

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento de Historia Contemporánea



**MODERNIZACIÓN SOCIALISTA Y REFORMA
LABORAL (1982-1992)**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR**

Sergio Gálvez Biesca

Bajo la dirección del doctor

Julio Aróstegui Sánchez

Madrid, 2013

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA



TESIS DOCTORAL

***MODERNIZACIÓN SOCIALISTA Y
REFORMA LABORAL
(1982-1992)***

Memoria para optar al Grado de Doctor presentada por:

Sergio GÁLVEZ BIESCA

Dirigida por:

Dr. Julio ARÓSTEGUI SÁNCHEZ

Madrid, 2012

ISBN: 978-84-695-4912-4

A los que se fueron y vinieron
Para JUAN y MARIO

ÍNDICE

Índice de Gráficos	8
Índice de Tablas	11
Índice de cuadros	20
Siglas	21
1. Presentación	29
I. HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN	
2. Herramientas y estrategias de investigación: caminos de aproximación, estado de la cuestión y fuentes.....	75
2.1. Nuestros caminos de aproximación: interrogantes e hipótesis de trabajo.....	75
2.1.1. 1ª Hipótesis de trabajo. La conquista del poder político del socialismo español: la <i>misión histórica</i> del PSOE (1972-1982)	77
2.1.2. 2ª Hipótesis de trabajo. Los ejecutivos socialistas y la reestructuración del modelo capitalista español (1982-1992)	78
2.1.3. 3ª Hipótesis de trabajo. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo ...	80
2.2. Un estado de la cuestión de circunstancias	82
2.2.1. Ciencias económicas: un campo de batalla entre interpretaciones radicalmente diferentes entre sí.....	82
2.2.2. El Derecho del Trabajo y los economistas «laboralistas»	87
2.2.3. Estudios y aproximaciones a la concertación social, la negociación colectiva, la política de rentas y las reformas del mercado de trabajo	93
2.2.4. El mundo del trabajo y las relaciones laborales: un balance generalista	97
2.2.5. Sociología de la juventud: rebatiendo las tesis consensualistas e institucionales.....	105
2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinares	115
2.2.7. La cuestión generacional: debatiendo las <i>tesis consensualistas</i>	122
2.2.8. Ciencias políticas: una bibliografía central para el estudio del socialismo y de la socialdemocracia europea a nivel comparado	128
2.2.9. Las obras periodísticas: una gran base de datos por explorar	134
2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: la historia oficial/militante y los «soportes intelectuales» del socialismo español	138
2.2.11. La historiografía académica y profesional: una <i>agenda investigadora</i> prácticamente por inaugurar.....	165
2.3. <i>Papeles</i> para una historia del presente vivido	174
2.3.1. Anomalías, obstáculos jurídicos y demás voluntades políticas	174
2.3.1.1. Fuentes primarias	181
2.3.1.2. Fuentes secundarias.....	183
2.3.3.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica	189
3. A vueltas con la historia social: debates, controversias y dilemas del historiador social hoy España.....	212
3.1. Un pequeño-gran debate por explorar: <i>ortodoxos</i> y <i>heterodoxos</i> en busca del sentido de lo social.....	218

3.2. Un balance revisitado: ¿una agenda investigadora <i>inconclusa</i> ?	244
3.3. Debates, lecturas y controversias en torno al <i>nuevo</i> movimiento obrero en la España de la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos	265
II. LA CONQUISTA DEL PODER POLÍTICO DEL SOCIALISMO ESPAÑOL: LA <i>MISIÓN HISTÓRICA</i> DEL PSOE (1972-1982)	
4. La metamorfosis del PSOE: las contradicciones del <i>socialismo modernizador</i> (1972-1992)	286
4.1. El «partido de la modernización»: las raíces políticas, ideológicas y culturales de la <i>metamorfosis</i> del PSOE	287
4.2. La particular transición socialista hacia el poder político	295
4.2.1. La consolidación de una <i>nueva coalición de poder</i> (1972-1977)	295
4.2.2. Hacia la conquista del poder político: la «misión histórica» del socialismo (1977-1982)	314
4.2.2.1. Construcción de un socialismo para la conquista del poder político (1977-1979)	314
4.2.2.2. La irrevocable necesidad de <i>descargarse de la sobrecarga ideológica</i> : las lecciones de 1979	329
4.2.2.3. La moderación programada (1979-1981)	347
4.3. Un partido para el poder: la cultura organizativa del socialismo	364
4.4. «Por el cambio»: <i>el punto de no retorno</i> (1981-1982)	380
5. Gabinetes «tecnocráticos» y «liberales» para los nuevos tiempos	423
5.1. Las <i>idas y venidas</i> en el Consejo de Ministros: breve y ajustado relato de la composición de los gobiernos socialistas en la «década del cambio»	426
III. LOS EJECUTIVOS SOCIALISTAS Y LA REESTRUCTURACIÓN DEL MODELO CAPITALISTA ESPAÑOL (1982-1992)	
6. La «revolución burguesa pendiente»: las vicisitudes de la <i>única política posible</i> y/o el síndrome NHA	456
6.1. Las condiciones objetivas vs subjetivas del trance modernizador	458
6.1.1. Puntos de partida	458
6.1.2. La necesaria «catarsis del pasado». <i>La doctrina del Shock para el caso de España</i>	468
6.1.3. La crisis económica <i>diferencial</i> española: la construcción de las «condiciones necesarias»	472
6.1.4. Los márgenes de actuación de los partidos socialdemócratas. El caso del <i>socialismo español</i>	479
6.2. La «salida progresista» a la crisis	481
6.2.1. Los tres pilares de la <i>lógica de la estrategia de la modernización socialista</i>	486
6.2.1.1. Principios de realidad: el <i>Programa Económico a Medio Plazo</i>	497
6.2.2. El «gran enemigo» a batir: la <i>inflación</i>	509
6.2.3. La ortodoxia por bandera: el <i>déficit público</i>	519
6.2.4. El embrujo de la <i>retórica europeizante</i>	523
7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de crecimiento	535

7.1. Balance de una «década de ajuste solidario»	537
7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)	537
7.1.2. Continuidad y desaceleración reformista: los llamados «años dorados» del socialismo (1986-1989/1990).....	566
7.1.3. Del «recalentamiento» económico a Maastricht: el <i>Programa de Convergencia</i> (1989/1990-1992)	596
7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Una «obstáculo» en el <i>único camino posible</i> de la economía política socialista?	623
8. El precio de la modernización. «Principios de realidad» esenciales: los resultados macroeconómicos	723
8.1. ¿El gran salto adelante?	726
8.2. En busca del «mana»: las vías de la internacionalización de la economía española	736
8.2.1. La «obsesión enfermiza»	744
8.3. El «precio» de la modernización: los <i>costes sociales y humanos</i>	776
8.4. Un posible balance en torno a la época socialista alejado de los <i>lugares comunes</i>	845
IV. HISTORIA DE UNA REFORMA LABORAL: CONTRAHEGEMONÍAS, CRISIS, CONFLICTO Y VIOLENCIA EN EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO	
9. En nombre de la «modernización»: <i>el mandato de la flexibilidad</i> (octubre 1976-febrero 1983)	855
9.1. Un «contexto histórico de emergencia»	855
9.2. Diagnóstico y pronóstico del SERL: la <i>única política posible</i> (liberal) en su versión laboral.....	860
9.3. Breve historia de la contratación temporal en España durante la transición posfranquista. <i>Del Derecho del Trabajo de la crisis a la institucionalización de la temporalidad</i> (1976-1982/1983).....	866
9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. <i>Los arduos inicios de la flexibilización</i> (octubre 1976-marzo1980)...866	
9.3.2. De la aprobación del Estatuto de los Trabajadores al primer Gobierno socialista. <i>Rumbo fijo hacia la liberalización</i> (marzo 1980-octubre 1982)	902
9.3.2.1. El Acuerdo Nacional de Empleo: a <i>vueltas con el secretismo</i> en torno a la contratación temporal (enero/febrero 1981-junio 1981)	911
9.3.3. Meses de transición entre dudas y certezas. <i>El cambio titubeante</i> (diciembre 1982-febrero 1983)	970
10. Historia e intrahistoria de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 (marzo/mayo 1983-febrero 1984)	1006
10.1. Razones de un estudio.....	1006
10.2. Los alcances históricos, sociales y jurídicos de la Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984	1013
10.2.1. El momento de la toma decisión política: <i>la irrevocable necesidad de flexibilizar</i> (marzo/mayo 1983-agosto 1983)	1014
10.2.1.1. El XXXIII Congreso de la UGT: el «bautismo» en la lógica de la modernización socialista (junio 1983)	1022

10.2.2. Sin concertación social pero con «acuerdo» para la reforma del Estatuto de los Trabajadores: <i>la flexibilización del mercado de trabajo cobra forma y contenido</i> (septiembre 1983-noviembre 1983).....	1046
10.2.3. Crisis y agonía final del <i>non nato</i> Acuerdo Interconfederal de 1984: el extraño caso del «proceso de hibernación parlamentaria» de la reforma del Estatuto de los Trabajadores (diciembre 1983-febrero de 1984)	1092
11. En busca de la «paz social» en tiempos de conflicto obrero: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero /febrero-julio 1984) ...	1124
11.1. La <i>narrativa socialista</i> frente a la realidad socioeconómica: el particular como singular <i>realismo mágico</i> del socialismo español	1126
11.2. El último episodio de «lucha de clases» en la España contemporánea: el I Trimestre <i>largo</i> de 1984	1132
11.2.1. El mapa del conflicto obrero: datos, interpretaciones y demás evidencias del «caso español» en perspectiva internacional.....	1134
11.2.2. Reconstruyendo las <i>lógicas de la conflictividad</i> social-obrera en la España de los ochenta.....	1151
11.2.3. El movimiento obrero realiza la «puesta a punto»: los inicios del <i>proceso de normalización</i> de la conflictividad (enero 1984).....	1158
11.2.4. Comisiones Obreras en primera línea: del estallido de la «alarma social» a la elaboración de la respuesta política, jurídica y político-militar (febrero 1984)	1165
11.2.5. El Gobierno reacciona. Deslegitimación y represión contra el movimiento obrero: de la «alarma social» a la situación de «emergencia político-social» (marzo 1984).....	1184
11.2.5.1. González Márquez en TVE: fabricando <i>consensos</i> en torno a la «única política posible».....	1199
11.2.6. Punto y aparte de la conflictividad obrera: la necesaria derrota del movimiento obrero (y de CCOO) como base del éxito y de la legitimación del proyecto de modernización socialista (abril-julio 1984).....	1206
11.2.6.1. Sagunto y los Altos Hornos del Mediterráneo: <i>éxitos y fracasos</i> del «laboratorio de pruebas» de la política de reconversión industrial socialista.....	1213
12. La «necesidad hecha virtud»: el difícil parto del Acuerdo Económico y Social (febrero 1984-diciembre 1984)	1222
12.1. De vuelta a <i>los despachos</i> : el largo preámbulo de la reconstrucción del <i>fallido</i> diálogo social (febrero-julio 1984).....	1222
12.2. Los tres escenarios de la negociación del AES (julio-octubre de 1984).....	1262
12.2.1. Guardando las apariencias: tanteos preliminares (26 de julio-26 agosto) ...	1264
12.2.2. Conspiraciones, traiciones y «cantos de sirena» del Gobierno (27 de agosto-9 de septiembre)	1271
12.2.3. Tiempos de «pactos de silencio» (10 de septiembre-25 de septiembre).....	1279
12.2.4. La escenificación del cuarto y último «acto del drama» del AES (26 de septiembre-8 de octubre).....	1289
12.2.5. El primer y el último acuerdo social de la época socialista: análisis del Acuerdo Económico y Social	1311
12.3. La larga <i>resaca</i> del AES (octubre/diciembre 1984-1985/1986)	1317
12.3.1. Historia de una <i>fotografía</i> : un acuerdo social que no termina de arrancar ..	1318

12.3.2. La «Operación AES». Los frentes se multiplican: de la campaña de <i>El País</i> – bajo guión de Rodolfo Serrano– al Juzgado de Guardia.....	1324
12.2.3. ¿La CEOE traicionada?	1346
12.3.4. ¿Divisiones en la familia socialista? De entrada, NO. Los <i>costes tangibles y no tangibles</i> del AES.....	1356
12.4. El «gran salto adelante». El desarrollo legislativo de la RET'84: examen de las bases político-institucionales y de los mecanismos jurídicos de la formación histórica de la «cultura empresarial de la precariedad».....	1370
13. Conclusiones	1394
Bibliografía.....	1405
Anexo estadístico	1569

Índice de Gráficos

- Gráfico 1. Evolución del PIB a precios constantes, 1980-1996 (millones de pesetas de 1995) [capítulo 8]
- Gráfico 2. Evolución de la tasa de variación anual del PIB real, 1978-1996 [capítulo 8]
- Gráfico 3. Crecimiento del PIB de España en comparación con la CEE, 1982-1992 [capítulo 8]
- Gráfico 4. Tasa media de crecimiento económico del PIB, 1940-1990 (%) [capítulo 8]
- Gráfico 5. Evolución comparada del PIBpm per cápita en relación al PIBpm, 1980-1996. Tasas de variación anual (%) [capítulo 8]
- Gráfico 6. Evolución del PIBcf per cápita, 1940s-1990s (% del PIB) [capítulo 8]
- Gráfico 7. Evolución del grado de apertura del mercado español, 1982-1992. Tasa de variación (% PIB) [capítulo 8]
- Gráfico 8. Evolución comparada de la inflación entre España y la CEE, 1977-1993 (%) [capítulo 8]
- Gráfico 9. Evolución del poder adquisitivo salarial a través de la negociación colectiva en España entre 1982 a 1992 [capítulo 8]
- Gráfico 10. Evolución de la tasa acumulada desde 1981 en relación a los salarios pactados en convenios, a nivel total, 1982-1992 [capítulo 8]
- Gráfico 11. Evolución comparativa del SMI y el IPC, 1982-1992 [capítulo 8]
- Gráfico 12. Participación en porcentaje del PIB de los distintos sectores económicos, 1982 [anexo]
- Gráfico 13. Participación en porcentaje del PIB de los distintos sectores económicos, 1986 [anexo]
- Gráfico 14. Participación en porcentaje del PIB de los distintos sectores económicos, 1992 [anexo]
- Gráfico 15. Ingresos por privatizaciones en relación al PIB anual (miles de millones de pesetas) [anexo]
- Gráfico 16. Ingresos por privatizaciones en relación al PIB anual (%) [anexo]
- Gráfico 17. Evolución comparada de la productividad por persona empleada en España y en la UE, 1980-1996 (%) [capítulo 8]
- Gráfico 18. Evolución de las tasas anuales (%) de la productividad por hora, la productividad por ocupado y el coste laboral unitario en España, 1982-1992 [capítulo 8]
- Gráfico 19. Evolución del déficit público en España comparado con la UE-15, 1982-1992 (% del PIB) [capítulo 8]
- Gráfico 20. Evolución de la presión fiscal en España, en la UE-15 y en los países de la OCDE, 1985-1992 (%) [capítulo 8]
- Gráfico 21. Evolución del mínimo máximo del IRPF en España, 1982-1992 [anexo]
- Gráfico 22. Nivel de renta a partir de la aplicación del tipo máximo del IRPF, 1982-1992 [anexo]

- Gráfico 23. Evolución de los tipos medios en el IRPF para rendimientos del trabajo con poder adquisitivo constante, 1979-1995 (euros de 2004) [anexo]
- Gráfico 24. Variación del tipo medio del IRPF por niveles de renta con poder adquisitivo constante (euros 2004) [anexo]
- Gráfico 25. Evolución del gasto público en España y en la UE, 1982-1992 (% del PIB) [capítulo 8]
- Gráfico 26. Evolución comparada de la tasa anual de desempleo en España y el UE, 1982-1992 (%) [capítulo 8]
- Gráfico 27. Evolución de la tasa de paro total, junto con la de hombres, mujeres y jóvenes, 1982-1996 (%) [anexo]
- Gráfico 28. Evolución de las tasas anuales del Paro de Larga Duración, 1982-1992 (%) [capítulo 8]
- Gráfico 29. Evolución de las tasas de cobertura (%) neta y bruta del seguro de desempleo, 1982-1992 [capítulo 8]
- Gráfico 30. Evolución de los accidentes mortales de trabajo en España, 1982-1992 [capítulo 8]
- Gráfico 31. Evolución de los accidentes graves en la jornada de trabajo y *in itinere*, 1982-1992 [capítulo 8]
- Gráfico 32. Evolución comparada y total de los resultados electorales obtenidos por UGT y CCOO [anexo]
- Gráfico 33. Evolución comparada del descenso de la conflictividad, medida en número de huelgas, en un conjunto de países sometidos a políticas de carácter netamente liberal entre 1976-1996 [anexo]
- Gráfico 34. Evolución de la actividad huelguística en España en número de huelgas por año y en perspectiva comparada entre los datos del MTAS y la CEOE, 1977-1996 [anexo]
- Gráfico 35. Evolución del promedio de huelgas diarias por conjunto de años y para el total, 1977-1996 [anexo]
- Gráfico 36. Evolución de la conflictividad laboral, medida en número de huelgas, en un conjunto de países europeos durante la primera parte de la década de los años ochenta en plena «oleada neoliberal» (1980-1986) [anexo]
- Gráfico 37. Número de huelgas en España y en los países de su entorno en 1984 [anexo]
- Gráfico 38. Número total de participantes en huelgas laborales en España y los países de su entorno en 1984 [anexo]
- Gráfico 39. Días no trabajados en España por huelgas España y en los países de su entorno en 1984 [anexo]
- Gráfico 40. Evolución de la actividad huelguística, según el MTAS y según la CEOE, durante la primera legislatura socialista, 1983-1986 [anexo]
- Gráfico 41. Número de trabajadores participantes en huelgas laborales, según el MTAS y según la CEOE, durante la primera legislatura socialista, 1983-1986 [anexo]

- Gráfico 42. Número de jornadas perdidas en huelgas laborales, según el MTAS y según la CEOE, durante la primera legislatura socialista, 1983-1986 [anexo]
- Gráfico 43. Cálculo de la evolución participación de la población activa en conflictos laborales durante la época socialista, 1982-1996 [anexo]
- Gráfico 44. Evolución del número de participantes (miles) en huelgas laborales por sector y año durante la primera legislatura socialista, 1983-1986 [anexo]
- Gráfico 45. Evolución de la participación (en miles) en huelgas generales durante la época socialista, 1982-1992 [anexo]
- Gráfico 46. Evolución de los salarios pactados en la negociación colectiva, la inflación anual y el poder adquisitivo en durante la primera legislatura socialista (%) [anexo]
- Gráfico 47. Evolución del poder adquisitivo durante la “década del cambio”, 1982-1992 (%) [anexo]

Índice de Tablas

Tabla 1.	Evolución de la intención del voto (%) entre 1979-1981 [capítulo 2]
Tabla 2.	Evaluación de la economía sumergida en España, 1982/1992 [anexo]
Tabla 3.	Evolución de las estimaciones de la economía sumergida en España, 1982-1992 [anexo]
Tabla 4.	Evolución del PIB a partir de estimaciones alternativas al coste de los factores, 1980-1996 (1995=100) [anexo]
Tabla 5.	Evolución del PIB a precios constantes, 1980-1996 (millones de pesetas de 1995) [anexo]
Tabla 6.	Evolución de la demanda interna en España y en la UE, 1982-1992 (en % del PIB) [anexo]
Tabla 7.	Evolución de los diversos componentes de la demanda agregada a precios constantes, 1982-1992 (1995=100) [anexo]
Tabla 8.	Evolución del consumo privado nacional y el consumo privado nacional per cápita, 1982-1992 (millones de pesetas, 1999) [anexo]
Tabla 9.	Evolución del gasto anual medio por persona por grupos de gastos (pesetas corrientes) y del IPC (base 1992), 1980, 1985-1992 [anexo]
Tabla 10.	El PIB per cápita, 1980-1996 (miles de pesetas de 1995) [anexo]
Tabla 11.	Evolución del PIB p.m. y PIB per cápita en tasas porcentuales de variación interanual, 1980-1996 [anexo]
Tabla 12.	Evolución del PIB per cápita España/UE-15, 1982-1992 (UE=100) [anexo]
Tabla 13.	Evolución del grado de apertura de España, 1982-1992 (%) [anexo]
Tabla 14.	Evolución del comercio exterior de bienes y servicios, 1982-1992 (% PIB) [anexo]
Tabla 15.	Evolución del grado de apertura de España y la Unión Europea a nivel comunitario, 1982-1992 (Exportaciones de bienes y servicios en % del PIB) [anexo]
Tabla 16.	Evolución del grado de apertura de España y la Unión Europea a nivel extracomunitario, 1982-1992 (exportaciones de bienes y servicios en % del PIB) [anexo]
Tabla 17.	Distribución geográfica de las exportaciones e importaciones de España, 1982-1992 (%) [anexo]
Tabla 18.	Evolución de la estructura por productos y ventaja comparativa revelada (VCR), 1973, 1984, 1989, 1995 [anexo]
Tabla 19.	Evolución del coste de las importaciones españolas de petróleo en % del PIB, 1982-1992 [anexo]
Tabla 20.	Evolución de la participación del petróleo en el consumo de energía primaria en España y en la UE, 1973-1995 [anexo]

Tabla 21.	Evolución de los principales indicadores de la posición internacional de España en el comercio mundial, 1982-1996 [anexo]
Tabla 22.	Evolución de la inversión directa de España en el Resto del Mundo y la inversión directa del Resto del Mundo en España, 1982-1992 [anexo]
Tabla 23.	Evolución del saldo de la balanza por cuenta corriente e inversión directa extranjera, 1980-1996 (millones de euros) [anexo]
Tabla 24.	Evolución del saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente en España y en la UE, 1982-1992 (en % del PIB) [anexo]
Tabla 25.	Evolución del saldo comercial, 1982-1992 (millones de pesetas corrientes) [anexo]
Tabla 26.	Evolución de la relación real de intercambio en la economía española, 1978-1992 (1991=100) [anexo]
Tabla 27.	Evolución de los saldos financieros España-CEE, 1986-1996 [anexo]
Tabla 28.	Balance presupuestario de la UE para España por partidas, 1986-1993 [anexo]
Tabla 29.	Evolución del tipo de cambio de la peseta con respecto a la Libra, el Franco Francés y el Dólar, 1982-1996 [anexo]
Tabla 30.	Evolución del tipo de cambio efectivo nominal y con precios de consumo y costes laborales unitarios, 1982-1996. Tasas de variación [anexo]
Tabla 31.	Evolución del tipo de interés a corto plazo en España y en la UE, 1982-1992 (Interbancario a 3 meses) [anexo]
Tabla 32.	Evolución del tipo de interés a largo plazo en España y la UE, 1982-1992 (Rentabilidad de los bonos a 10 años) [anexo]
Tabla 33.	Evolución del tipo de deuda a largo plazo, junto con otras variables, en España, 1982-1992 [anexo]
Tabla 34.	Evolución de la inversión pública, la inversión privada, el ahorro privado y el FBCF en % del PIB, 1982-1992 (Tasas de variación) [anexo]
Tabla 35.	Evolución de las tasas de Ahorro Nacional y la Formación Bruta de Capital, 1982-1992 (en % del PIB) [anexo]
Tabla 36.	Evolución del stock de capital privado por ocupado, 1982-1992. Tasas de variación [anexo]
Tabla 37.	Evolución de constitución de sociedades anónimas en España, 1982-1992. Numero y capital fundacional (millones de ptas.) [anexo]
Tabla 38.	Evolución del índice de la Bolsa de Madrid, 1982, 1992 (31 diciembre de 1985=100) [anexo]
Tabla 39.	Evolución de los “ALPES”, 1982-1992. Tasas de variación anual [anexo]
Tabla 40.	Construcción de kilómetros de autopistas y autovías en España, 1985-1992 (en miles) [anexo]
Tabla 41.	Evolución de la tasa de inflación anual en España y en la UE, 1982-1992 (deflactor consumo privado final) [anexo]

Tabla 42.	Evolución del Índice de Precios de Servicios y de Bienes Elaborados no Energéticos, 1982-1992. Tasas de variación anual [anexo]
Tabla 43.	Evolución de las tasas de cobertura de la negociación colectiva, 1982-1992 [anexo]
Tabla 44.	Evolución de las tasas de cobertura por negociación colectiva en el ámbito de la empresa y ámbito superior, 1982-1992 [anexo]
Tabla 45.	Cuadro comparativo de la norma salarial, variación del IPC e incremento salarial pacto en convenios, 1982-1989 [anexo]
Tabla 46.	Evolución de los salarios pactados en la negociación colectiva, la inflación anual y el poder adquisitivo, 1982-1992 [anexo]
Tabla 47.	Evoluciones de los salarios pactados, nominales y reales, 1982-1992 (tasas de variación, %) [anexo]
Tabla 48.	Evolución de la tasa anual de los salarios pactados en convenios, a nivel total, por empresa y en otros ámbitos, 1982-1992 [anexo]
Tabla 49.	Evolución de la tasa acumulada desde 1981 en relación a los salarios pactados en convenios, a nivel total, por empresa y otros ámbitos, 1982-1992 [anexo]
Tabla 50.	Ganancia media por trabajador y mes en jornada normal y extraordinaria, 1980-1996 (ptas. corrientes) [anexo]
Tabla 51.	Coste laboral medio por trabajador y mes en ptas. Coste salarial, 1982-2000 (100=2000) [anexo]
Tabla 52.	Evolución del salario real por persona empleada en España y en la UE, 1982-1992. Tasas de variación anual [anexo]
Tabla 53.	Evolución del salario real y el salario real neto a partir de la base de datos del Modelo Hermin-España, 1982-1992. Tasas de variación anual (%) [anexo]
Tabla 54.	Evolución Salario Mínimo Interprofesional, 1982-1992 (mayores de edad) [anexo]
Tabla 55.	Participación en porcentaje del PIB de los distintos sectores económicos, 1977-1996 [anexo]
Tabla 56.	Evolución de los diversos sectores económicos que componen el PIB, 1982-1992 (a precios constantes, 1995=100) [anexo]
Tabla 57.	Población y demanda de trabajo, 1970-2000. Serie quinquenal [anexo]
Tabla 58.	Ocupados por sectores, 1982-1992 (%) sobre el total [anexo]
Tabla 59.	Evolución de la destrucción de empleo industria, 1974-1984 [anexo]
Tabla 60.	Estructura Grupo INI. Balance de situación. Principales rúbricas del activo y pasivo, 1982-1992 (millones de pesetas) [anexo]
Tabla 61.	Evolución del número de efectivos del Instituto Nacional de Industria, 1982-1989 [anexo]
Tabla 62.	Previsión del impacto sobre el empleo industrial por Comunidades Autónomas, según el Programa de Reconversión Industrial, 1981-1985 [anexo]

Tabla 63.	Distribución regional de los excedentes de empleos de los sectores declarados en reconversión, 1985 [anexo]
Tabla 64.	Proyectos aprobados por las Comisiones Gestoras de las ZUR (no desistidos hasta 30/IV/1988) [anexo]
Tabla 65.	Realización de proyectos en las zonas declaradas ZUR (hasta el 30/IV/1988) [anexo]
Tabla 66.	Ajuste laboral de la reconversión minera en Asturias, 1991-1993 [anexo]
Tabla 67.	Empresas públicas privatizadas en España, 1985-1996 (no incluye OPVs) [anexo]
Tabla 68.	Privatización y reestructuración de las empresas del INH, 1981-1990 [anexo]
Tabla 69.	Ingresos del Estado mediante OPV, 1986-1996 [anexo]
Tabla 70.	Índice de Producción Industrial, 1982-1992 (1929-1931=100)
Tabla 71.	Estructura económica-financiera y empleo de las empresas públicas y privadas españolas, 1989-1996 [anexo]
Tabla 72.	Evolución de la productividad sectorial y de las empresas reestructuradas del INH y del INI, 1980-1990 [anexo]
Tabla 73.	Principales características de las viviendas construidas, 1982-1992 (unidades) [anexo]
Tabla 74.	Parque de viviendas en Madrid y en Barcelona, junto al total, 1960-2001 [anexo]
Tabla 75.	Evolución del precio del m ² de la vivienda nueva, 1980-1992 [anexo]
Tabla 76.	Evolución de los precios de la vivienda nueva en Barcelona, 1982-1992 (pesetas de 1996) [anexo]
Tabla 77.	Tipología de viviendas según el régimen de tenencia, 1981-2001 (miles) [anexo]
Tabla 78.	Indicadores del sector inmobiliario, 1982-1992 [anexo]
Tabla 79.	Entidades de crédito: cajas de ahorro e instituciones financieras no bancarias, 1982-1992 (datos a fin de año, en millones de pesetas) [anexo]
Tabla 80.	Distribución porcentual de la capitalización de los valores de renta variable oficialmente admitidos en la Bolsa de Madrid, según su cotización a fin de año, por sectores económicos, 1976-1996 [anexo]
Tabla 81.	Evolución del número de visitantes entrados en España, 1982-1992 (miles de personas) [anexo]
Tabla 82.	Evolución del número de turistas, ingresos y pagos por turismo exterior, 1982-1992 [anexo]
Tabla 83.	Evolución de los principales indicadores del turismo en España, 1975-1992 [anexo]
Tabla 84.	El turismo internacional como cobertura de la balanza de pagos, 1982-1992 (miles de millones de pesetas) [anexo]

Tabla 85.	Evolución del gasto en I+D en porcentaje del PIB en España y en la UE, 1986-1996 [anexo]
Tabla 86.	Evolución de la estructura del gasto en I+D, 1985-1995 [anexo]
Tabla 87.	Balanza tecnológica española en millones de pesetas y porcentaje de cobertura, 1982-1992 [anexo]
Tabla 88.	Patentes registradas en España: solicitudes, concesiones y residencia del titular, 1982-1992 [anexo]
Tabla 89.	Patentes registradas según los sectores con más probable uso de la tecnología, 1982-1992 [anexo]
Tabla 90.	Evolución de los Costes Laborales Unitarios Reales en España y en la UE, 1982-1996 (1991=100) [anexo]
Tabla 91.	Costes salariales unitarios de España en comparación con la UE-12 y Estados Unidos, 1980-1996 (Base 1991=100) [anexo]
Tabla 92.	Evolución de los Costes Laborales Unitarios, según sus tasas de variación anual, en España y en la UE, 1982-1992 [anexo]
Tabla 93.	Evolución de la tasa anual de creación de empleo y tasa anual de desempleo en España y en la UE, 1982-1992 (%) [anexo]
Tabla 94.	Evolución del coste laboral real, el coste laboral unitario y la productividad a partir de la base de datos del Modelo Hermin-España, 1982-1992. Tasas de variación anual (%) [anexo]
Tabla 95.	Estructura factorial del VAB a coste de los factores, 1977-1996 (% de cada factor respecto al VAB) [anexo]
Tabla 96.	Evolución comparada en porcentaje del PIB de las remuneraciones salariales y el excedente bruto de explotación en España, 1985-1992 [anexo]
Tabla 97.	Evolución comparada de la participación ajustada de los salarios en porcentaje del PIB en España y en la UE, 1982-1992 [anexo]
Tabla 98.	Cuentas consolidadas del Sector Público español: Ingresos y Gastos Públicos (% del PIB) [anexo]
Tabla 99.	Estructura básica del Sector Público en España y comparación de la deuda pública con la UE, 1982-1992 [anexo]
Tabla 100.	Déficit presupuesto e inversión pública, 1982-1992 [anexo]
Tabla 101.	Gasto público, ingresos públicos, saldo presupuestario y deuda pública por lustros en España y en la UE, 1976-1995 (% del PIB) [anexo]
Tabla 102.	Gastos del Estado: clasificación económica, 1982-1992 (miles de millones de ptas.) [anexo]
Tabla 103.	Saldo presupuestario liquidado del Estado, 1977-1996 (millones de ptas.) [anexo]
Tabla 104.	Deuda pública total en circulación, 1982-1992 (miles de millones de pesetas) [anexo]
Tabla 105.	Cuadro general sobre los ingresos totales y los ingresos fiscales del Estado, 1982-1992 [anexo]

Tabla 106.	Selección de ingresos del Estado: clasificación económica, 1982-1992 (miles de millones de pesetas) [anexo]
Tabla 107.	Selección de la evolución de algunos de los impuestos directos principales del Estado, 1982-1992 (miles de millones de pesetas) [anexo]
Tabla 108.	Evolución del número de declaraciones del Impuesto de Sucesiones y de número de declaraciones del IRPF, junto con el % entre ambas, 1982-1992. Régimen General y Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya [anexo]
Tabla 109.	Evolución de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 1982-1992 (millones de euros corrientes) [anexo]
Tabla 110.	Calendario de cesión de impuestos a las CCAA de régimen común [anexo]
Tabla 111.	Evolución de algunos parámetros fiscales básicos en España y en la OCDE, 1980-1995 [anexo]
Tabla 112.	Número de declaraciones del IRPF y presentación de los resultados del efecto redistributivo del IRPF, 1982-1992. Índice de Gini (V=2) [anexo]
Tabla 113.	Selección de la evolución de algunos de los impuestos indirectos principales del Estado, 1982-1992 (miles de millones de pesetas) [anexo]
Tabla 114.	Tipos de impositivos del IVA, 1986-1992 [anexo]
Tabla 115.	Evolución de la recaudación de los impuestos sobre el consumo en porcentaje del PIB, 1982-1992 [anexo]
Tabla 116.	Evolución de la recaudación de los impuestos sobre el consumo como porcentaje del total de imposición, 1982-1992 [anexo]
Tabla 117.	Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 del Impuesto sobre el Valor Añadido como porcentaje del PIB, 1982-1992 [anexo]
Tabla 118.	Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 del Impuesto sobre el Valor Añadido como porcentaje total de imposición, 1965-2001 [anexo]
Tabla 119.	Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos sobre el consumo como porcentaje del PIB, 1965-2001 [anexo]
Tabla 120.	Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos sobre el consumo como porcentaje total de imposición, 1965-2001 [anexo]
Tabla 121.	Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos sobre consumos específicos como porcentaje del PIB, 1965-2001 [anexo]
Tabla 122.	Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos sobre consumos específicos como porcentaje total de imposición, 1965-2001 [anexo]
Tabla 123.	Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos generales sobre el consumo como porcentaje del PIB, 1965-2001 [anexo]

Tabla 124.	Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos generales sobre el consumo como porcentaje del total de imposición, 1965-2001 [anexo]
Tabla 125.	Comportamiento del gasto público a través de sus principales partidas presupuestarias, 1982-1992 [anexo]
Tabla 126.	Evolución comparada a nivel internacional del gasto social en España por lustros, 1980-1995 [anexo]
Tabla 127.	Gastos corrientes de Protección Social por naturaleza, función y tipo de prestaciones, 1982-1992. Cuentas Integradas en términos SEEPROS (miles de millones de pesetas) [anexo]
Tabla 128.	Gastos del Estado: clasificación funcional, 1982-1992 (miles de millones de pesetas) [anexo]
Tabla 129.	Evolución del porcentaje sobre el PIB del Gasto Social en cada una de las partidas, 1982-1992 [anexo]
Tabla 130.	Índices de Cobertura del Gasto en Protección Social respecto al Promedio de la UE, 1982-1992 [anexo]
Tabla 131.	Cuentas de la Seguridad Social: rúbricas más significativas, 1982-1992 (miles de millones de pesetas) [anexo]
Tabla 132.	Ingresos corrientes de Protección Social por naturaleza y sector de procedencia, 1982-1992. Cuentas Integradas en términos SEEPROS (miles de millones de pesetas) [anexo]
Tabla 133.	Beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad Social. Evolución del número de pensionistas de la Seguridad Social, por clases, 1982-1992 [anexo]
Tabla 134.	Evolución de las prestaciones por incapacidad temporal, 1982-1992 (euros corrientes) [anexo]
Tabla 135.	Cuadro comparativo del poder adquisitivo de la pensión media en relación al PIB por habitante, 1982-1992 [anexo]
Tabla 136.	Evolución del empleo total, los trabajadores en alta de la Seguridad Social y el total del empleo asalariado, 1975-1996 (miles de personas) [anexo]
Tabla 137.	Evolución del paro registrado, 1976-1996. Media mensual [anexo]
Tabla 138.	Principales características de la evolución del desempleo, total, por sectores, y referente a los trabajadores sin empleo previo, 1981-1986 [anexo]
Tabla 139.	Evolución de la tasa de participación en el mercado de trabajo, 1982-1992. Total, por hombres, mujeres y jóvenes (%) [anexo]
Tabla 140.	Cobertura del desempleo, 1982-1996 [anexo]
Tabla 141.	Evolución de los beneficiarios de la prestación por desempleo, 1985-1996 (miles de personas) [anexo]
Tabla 142.	Evolución de los gastos por desempleo y cobertura (%) (Índice gasto promedio real 1982=100) [anexo]
Tabla 143.	Apartados principales de la financiación del sistema de protección al desempleo (miles de millones de pesetas corrientes) [anexo]

Tabla 144.	Principales partidas del gasto presupuestado por el INEM, 1982-1996 (miles de millones de pesetas corrientes) [anexo]
Tabla 145.	Evolución de la jornada efectiva semanal, 1982-1992 [anexo]
Tabla 146.	Jornada efectiva semanal por sexo, 1982-1992 [anexo]
Tabla 147.	Horas efectivas y habitualmente trabajadas por semana a partir de lo ocupados y asalariados agrarios, no agrarios, privados y públicos, 1982-1992 [anexo]
Tabla 148.	Evolución de las horas semanales de trabajo de los trabajadores a tiempo completo en la industria, 1966-1996 [anexo]
Tabla 149.	Normas sobre el tiempo de trabajo en la UE a raíz de la Directiva 93/104/CE [anexo]
Tabla 150.	Accidentes de trabajo en España, 1982-1992. Total y por mortales [anexo]
Tabla 151.	Accidentes de trabajo por sexo, 1982-1992 [anexo]
Tabla 152.	Accidentes mortales de trabajo en España, por año, mes, y día, 1982-1992 [anexo]
Tabla 153.	Índice de Incidencia de los accidentes por gravedad por cada mil asalariados, 1988-1995 [anexo]
Tabla 154.	Accidentes de trabajo, por el tipo de incapacidad producida, 1982-1992 [anexo]
Tabla 155.	Mortalidad laboral, por sectores, 1982-1992 [anexo]
Tabla 156.	Incidencia de accidentes según tipo de contrato y Riesgo Relativo (RR) por gravedad de accidente, 1988-1995 [anexo]
Tabla 157.	Riesgos Relativos (RR) por género y gravedad del accidente, 1988-1995 [anexo]
Tabla 158.	Riesgo Relativo (RR) específicos por grupo de edad y género para el total de accidentes [anexo]
Tabla 159.	Selección de los ingresos y gastos del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 1990-1992 [anexo]
Tabla 160.	Tasa de plusvalor (1954-2001). Tasas porcentajes medias de variación anual en los diferentes subperiodos seleccionados [capítulo 8]
Tabla 161.	Resultados de las elecciones sindicales, 1978-1994 [anexo]
Tabla 162.	Evolución del número de huelgas y de cierres patronales en los países de la UE-15 y otros países occidentales, 1976-1996 [anexo]
Tabla 163.	Evolución del número de trabajadores implicados en huelgas laborales en los países de la UE-15 y otros países occidentales, 1976-1996 [anexo]
Tabla 164.	Evolución de la conflictividad laboral medida en días no trabajados en los países de la UE-15 y en otros países occidentales, 1976-1996 [anexo]
Tabla 165.	Evolución de la conflictividad medida por la tasa de días no trabajados en una perspectiva comparada de una selección de países de la UE-15 y otros países occidentales, 1976-1996 [anexo]

Tabla 166.	Principales indicadores de la conflictividad laboral en España, según datos del Ministerio de Trabajo, 1976-1996 [anexo]
Tabla 167.	Principales indicadores de la conflictividad laboral en España, según datos de la CEOE, 1977-1996 [anexo]
Tabla 168.	Años con mayor número de conflictos durante la época socialista una vez eliminado el efecto de las huelgas generales de 1988, 1992 y 1994 [anexo]
Tabla 169.	Evolución de las principales variables de la conflictividad medida en promedio de años y en total, 1977-1996 [anexo]
Tabla 170.	Evolución de los principales indicadores básicos de la actividad huelguística en España, 1976-1996 [anexo]
Tabla 171.	Evolución de los principales básicos de la actividad huelguística en España medidos en promedio para un conjunto de años y en total, 1976-1996 [anexo]
Tabla 172.	Huelgas por sectores de actividad, 1982-1996. Participantes (miles) [anexo]
Tabla 173.	Cuadro comparativo de la participación de la población activa en conflictos laborales durante la época socialista, 1982-1996. Participantes (miles) [anexo]
Tabla 174.	Principales variables de la conflictividad laboral por sector, 1986-1996 [anexo]
Tabla 175.	Evolución de los motivos de la convocatoria de las huelgas laborables y no laborables, 1986-1996 [anexo]
Tabla 176.	Evolución de las huelgas convocadas, tanto por magnitud como por duración, en relación a diversas cuestiones laborales, de solidaridad o ante iniciativas político económicas (1986-1996) [anexo]
Tabla 177.	Evolución de las huelgas convocadas, tanto por magnitud como por duración, en relación a diversas cuestiones laborales, de solidaridad o ante iniciativas político económicas (1986-1996) [anexo]
Tabla 178.	Evolución de la actividad huelguística por Comunidades Autónomas, 1986-1992 (%) [anexo]

Índice de cuadros

- Cuadro 1. Líneas básicas del desarrollo legislativo de la Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 (octubre/noviembre 1984-mayo 1985) [capítulo 12]

Siglas

14-D	Huelga General del 14 de diciembre de 1988
23-F	Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981
ABI	Acuerdo Básico Interconfederal
AEB	Asociación Española de Banca
AGA	Archivo General de la Administración
AGETT	Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal
AEHE	Asociación Española de Historia Económica
AFE	Asociación de Futbolistas Españoles
AES	Acuerdo Económico y Social
AHC	Asociación de Historia Contemporánea
AHCJE	Archivo Histórico del Consejo de la Juventud de España
AHFFLC	Archivo Histórico Fundación Francisco Largo Caballero
AHFPI	Archivo Histórico Fundación Pablo Iglesias
AHFPI-AE	Archivo Histórico Fundación Pablo Iglesias-Archivo del Exilio
AHM	Altos Hornos del Mediterráneo
AHPCE	Archivo Histórico del Partido Comunista de España
AHT	Archivo Historia del Trabajo
AI	Acuerdo Interconfederal
ALP	Activos Líquidos en Manos del Público
AMI	Acuerdo Marco Interconfederal
ANE	Acuerdo Nacional de Empleo
AP	Alianza Popular
APD	Asociación para el Progreso de la Dirección
APIL	Asociación de Periodistas de Información Laboral
ATS	Ayudantes Técnicos Sanitarios
BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BM	Banco Mundial [WB, World Bank]

BNE	Biblioteca Nacional
BOCG	Boletín Oficial de las Cortes Generales
BOE	Boletín Oficial del Estado
BUP	Bachillerato Unificado Polivalente
CCAA	Comunidades Autónomas
CE	Constitución de España
CCP	Consejo Consultivo de Privatizaciones
CEIM	Confederación Empresarial de Madrid
CESID	Centro Superior de Información de Defensa
CCOO	Comisiones Obreras
CCOO-CC	Comisiones Obreras-Consejo Confederal
CCOO-CEC	Comisiones Obreras-Comisión Ejecutiva Confederal
CCOO-CONC	Comisiones Obreras-Comissió Obrera Nacional de Catalunya
CCOO-SC	CCOO-Secretariado Confederal
CDAE	Comisión Delegada para Asuntos Económicos
CDS	Centro Democrático y Social
CEE	Comunidad Económica Europea
CEOE	Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPES	Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales
CEPYME	Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
CES	Confederación Europea de Sindicatos
CES	Consejo Económico y Social
CES-CM	Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid
CGC	Confederación General de Cuadros
CGIL	Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CGSES	Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
CIA	Central Intelligence Agency
CIG	Confederación Intersindical Galega

CIS	Centro de Investigaciones Sociológicas
CJE	Consejo de la Juventud de España
CLU	Costes Laborales Unitarios
CLUR	Costes Laborales Unitarios Reales
CNAE	Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNC	Confederación Nacional de la Construcción
CN-PSOE	Comisión Nacional-Partido Socialista Obrero Español
CNI	Centro Nacional de Inteligencia
CNMV	Comisión Nacional del Mercado de Valores
CNO	Clasificación Nacional de Ocupaciones
CNT	Confederación Nacional del Trabajo
COAG	Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
COPYME	Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
COS	Coordinadora de Organizaciones Sindicales
CSIC	Centro Superior de Investigaciones Científicas
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
DT	Derecho del Trabajo
EBE	Excedente Bruto de Explotación
EHCP	Estadísticas de Huelgas y Cierre Patronales
ECOFIN	Economic and Financial Affairs Council
EDIS	Equipo de Investigación Sociológica
EEAT	Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo
ELA	Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos
EMT	Empresa Municipal de Transportes (Madrid)
EPA	Encuesta de Población Activa
EPF	Encuesta de Presupuestos Familiares
ERC	Esquerra Republicana de Catalunya
ERE	Expediente de Regulación de Empleo
ES	Economía Sumergida

ET	Estatuto de los Trabajadores
ETA	Euskadi Ta Askatasuna
ETCL	Encuesta Trimestral de Costes Laborales
ETT	Empresas de Trabajo Temporal
EUROSTAT	Statistical Office of the European Communities [Oficina Europea de Estadística de la Comisión Europea]
FCB	Formación Bruta de Capital
FBCF	Formación Bruta de Capital Fijo
FEDEA	Fundación de Estudios de Economía Aplicada
FEDER	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEOGA	Sistema de Financiación de la Política Agrícola Común
FIM	Fundación de Investigaciones Marxistas
FIP	Formación e Inserción Profesional
FMI	Fondo Monetario Internacional [IMF, International Monetary Fund]
FOGASA	Fondo de Garantía Social [originalmente, Fondo Nacional Interempresarial de Garantía Social]
FPE	Fondos de Promoción del Empleo
FSA	Federación Socialista Asturiana
FSE	Fondo Social Europeo
FUNCAS	Fundación de las Cajas de Ahorros
GAL	Grupos Antiterroristas de Liberación
GPS	Grupo Parlamentario Socialista
GRAPO	Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Mayo
HB	Herri Batasuna
HG	Huelga General
ICE	Información Comercial Española
IGTE	Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas
IHE	Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado
I+D	Investigación más Desarrollo

IGBM	Índice General de la Bolsa de Madrid
IMAC	Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación
INE	Instituto Nacional de Estadística
INEM	Instituto Nacional de Empleo
INH	Instituto Nacional de Hidrocarburos
INI	Instituto Nacional de Industria
INJUVE	Instituto de la Juventud
INSALUD	Instituto Nacional de la Salud
INTG	Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos
IPC	Índice de Precios al Consumo
IPI	Índice de Producción Industrial
IPSEBENE	Índice de Precios de los Servicios y de los Bienes Elaborados no Energéticos
IRPF	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ISSD	Impuesto Sucesiones y Donaciones
ISTAS	Instituto de Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
ITE	Instituto de Técnicas Electorales
ITE-PSOE	Instituto de Técnicas Electorales-Proyectos Sociales y Organizaciones Empresariales
IU	Izquierda Unida
IVA	Impuesto al Valor Agregado
LAB	Langile Abertzaleen Barzordeak
LBE	Ley Básica de Empleo
LCT	Ley de Contrato de Trabajo
LODE	Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación
LOLS	Ley Orgánica de Libertad Sindical
LRL	Ley de Relaciones Laborales
MIL	Movimiento Ibérico de Liberación
MIT	Massachusetts Institute of Tecnhnology
MTAS	Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

MTC	Mecanismo de Tipos de Cambio
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
NAIRU	Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment [Tasa de desempleo no aceleradora de la inflación]
NHA	No Hay Alternativa
OBJOVEM	Observatorio Joven de Empleo en España
OIT	Organización Internacional del Trabajo [ILO, International Labour Organization]
OJD	Oficina de Justificación de Difusión
OPV	Oferta Pública de Venta
EU-OSHA	European Agency for Safety and Health at Work [Agencia Europea para la Seguridad y la Salud]
OTAN	Organización del Tratado Atlántico Norte [NATO, North Atlantic Treaty Organization]
PAC	Política Agraria Común
PATCO	Professional Air Traffic Controllers Organization
PASOC	Partido de Acción Socialista
PASOK	Partido Socialista de Grecia
PCE	Partido Comunista de España
PGE	Presupuestos Generales del Estado
PEJ	Plan de Empleo Juvenil
PEMP	Programa Económico a Medio Plazo
PEN	Plan Energético Nacional
PER	Plan de Empleo Rural
PIB	Producto Interior Bruto
PIBcf	Producto Interior Bruto al coste de factores
PIBpm	Producto Interior Bruto a precios de mercado
PLD	Parados de Larga Duración
PNV	Partido Nacional Vasco
PP	Partido Popular

PRI	Partido Revolucionario Institucional [México]
PSB	Partido Socialista de Bélgica
PSC	Partit dels Socialistes de Catalunya
PSF	Partido Socialista de Francia
PSI	Partido Socialista del Interior
PSI	Partido Socialista Italiano
PSNPC	Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y la Crisis
PSP	Propuesta Sindical Prioritaria
PSP	Partido Socialista Popular
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
PSOE-CEF	Partido Socialista Obrero Español-Comisión Ejecutiva Federal
PSOE-CF	Partido Socialista Obrero Español-Comité Federal
PSOE-H	Partido Socialista Obrero Español-Histórico
PSUC	Partit Socialista Unificat de Catalunya
PTAS.	Pesetas
TC	Tribunal Constitucional
TCT	Tribunal Central de Trabajo
TINA	There is no alternative
TOP	Tribunal de Orden Público
TS	Tribunal Superior
TVE	Televisión Española
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development]
RAE	Real Academia Española
REIS	Revista Española de Investigaciones Sociológicas
RET'84	Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984
RD	Real Decreto
RD L	Real Decreto Legislativo
RD-L	Real Decreto-Ley

RNE	Radio Nacional de España
RR	Riesgos Relativos
SEEPROS	Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social [ESSPROS. European System of Integrated Social Protection Statistics]
SEPE	Servicio Público de Empleo Estatal
SER	Sociedad Española de Radiodifusión
SERL	Sistema Español de Relaciones Laborales
SIG	Signatura
SME	Sistema Monetario Europeo
SMI	Salario Mínimo Interprofesional
SMI	Servicio Militar de Información
SOC	Sindicato Obrero del Campo
SPD	Partido Socialdemócrata Alemán
SUP	Sindicado Unificado de Policía
UCD	Unión de Centro de Democrático
UE	Unión Europea
UGT	Unión General de Trabajadores
UGT-CEC	Unión General de Trabajadores. Comisión Ejecutiva Confederal
UGT-CC	Unión General de Trabajadores. Comité Confederal
UGT-FEMCA	Unión General de Trabajadores. Federación Estatal de Madera, Construcción y Afines
UGT-SOMA	Unión General de Trabajadores-Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias
UIMP	Universidad Internacional Menéndez Pelayo
UNIPYME	Unión de Organizaciones de Pequeña y Mediana Empresa
USO	Unión Sindical Obrera
VAB	Valor Añadido Bruto
ZID	Zonas Industriales en Declive
ZUR	Zonas Urgentes de Reindustrialización

1. Presentación

«El historiador serio es aquel que reconoce el carácter históricamente condicionado de todos los valores, y no quien reclama para sus propios valores una objetividad más allá del alcance de la historia».

Edward H. CARR, *Historia, Ciencia y Moralidad*¹.

«El pasado no fue tan bueno ni tan malo como imaginamos: sólo fue diferente».

Tony JUDT, *Algo va mal*².

«El obrero, pues, cambia el trabajo como valor de cambio simple, predeterminado, determinado por un proceso pasado [...] [E]l capital cambia el trabajo como trabajo vivo, como la fuerza productiva general de la riqueza [...]. Es claro que el trabajador no puede enriquecerse mediante este intercambio [...]. Más bien tiene que empobrecerse [el obrero] ya que la fuerza creadora de su trabajo en cuanto fuerza del capital, se establece frente a él como *poder ajeno* [...]. Todos los adelantos de la civilización, por consiguiente, o en otras palabras todo aumento de las *fuerzas productivas sociales* [...] no enrique al obrero sino al *capital* una vez más, sólo acrecienta el poder que domina el trabajo, aumenta sólo la fuerza productiva del capital».

Karl MARX, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política*³.

Hay lecturas que cambian la forma de observar lo que nos rodea, e influyen poderosamente en no pocas elecciones personales y vocaciones profesionales. Este es nuestro caso. A nuestras manos llegaría en un momento tan propicio como el fin de la licenciatura de Historia y de cara a un futuro doctorado, el conocido popularmente como *Informe Petras*⁴. Lo que allí se contaba así como la singular historia que lo rodeaba, tendría la suficiente capacidad de atracción para determinar la orientación central de esta investigación que ahora se presenta.

En el entorno de la izquierda política y social aquel *Informe* constituía una referencia central, especialmente para las generaciones más jóvenes. No pocas conversaciones, debates y lecturas giraban en torno al mismo. Petras y su *Informe* constituían, de hecho, parte de un imaginario colectivo compartido sobre los horizontes vitales y laborales de toda una generación. Con su simple cita –se hubiera leído o no– quedaba patente la crítica y denuncia de una

¹ CARR, Edward H., “Historia, ciencia y moralidad” en *¿Qué es la historia?* Barcelona, Ariel, 2001, p. 140 [*What is history?* London, University of Cambridge / Penguin, 1961].

² JUDT, Tony, *Algo va mal*, 2ª ed., Madrid, Taurus, 2010, p. 51 [*Ill Fares the Land*, New York, Penguin Press, 2010].

³ MARX, Karl, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Borrador 1857-1858*, 13ª ed., México, Siglo XXI, 1984, p. XXVII [edición de los conocidos *Grundrisse* por parte de, José Aricó, Miguel Murmis y Pedro Scaron].

⁴ El *Informe Petras* ha contado, hasta el momento, con cinco ediciones y rediciones: PETRAS, James, “Informe. ¿Qué ha pasado en España?”, *Ajoblanco*, nº 29, (marzo 1996), pp. 41-56 [una edición que contaría con la introducción y presentación de Oscar Fontrodona –editor de *Ajoblanco*– y de Julio Anguita, respectivamente]; id., “Informe Petras: Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles”, *Ajoblanco*, nº 3 [número especial] (verano 1996), pp. 16-82; id., *Trece años de Felipe González (Informe oculto por el Centro Superior de Investigaciones Científicas)*, Madrid, Movimiento Cultural Cristiano, 1996; id., *El Informe Petras [y otros ensayos]*, Hondarribia, Hiru, 2000; id., *El informe Petras. Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles*, [s/l] [s/ed.] [s/f] [www.cgt/es].

situación social y económica, que caracterizaba el final de la década de los noventa del siglo XX.

Convertido hoy, en la práctica, en una lectura clásica, sus múltiples ediciones dan cuenta de la trascendencia que en su momento adquirió, y que incluso hoy se le sigue dando por más que hayan pasado tres lustros. Aunque la simple cita al *Informe Petras* es más que suficiente para saber de lo que estamos hablando, el citado documento tendría no pocos títulos en su agitada intrahistoria. Así en pocos meses proliferarían una serie de ediciones por parte de editoriales menores. Ediciones que terminarían por popularizar dicho *Informe*. Aquí optaremos por el que el propio autor emplearía en su publicación completa: *Padres-Hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles*⁵.

El *Informe* sería encargado en su día por el CSIC al prestigioso sociólogo norteamericano James Petras con estatus de “investigador visitante” y despacho propio⁶. A partir de ese encargo, Petras realizaría un exhaustivo estudio sobre las consecuencias sociales y políticas de la “estrategia de la modernización” socialista, durante los meses de enero a junio de 1995. Es decir, nos situamos en el final de la “época socialista”. Un marco histórico, en donde a pesar de los signos de salida de la crisis económica de los primeros noventa, quedaba ya patente el descrédito político, social e inclusive ético de los socialistas en el poder.

Entregado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para su publicación, su lectura llevaría –con casi total seguridad, en tanto nunca hubo por parte de sus responsables comunicación “oficial” y/o “oficiosa” al respecto– a sus responsables a vetar tal posibilidad, a pesar de la propia insistencia del propio Petras durante los siguientes meses. Por cierto, no era aquel el primero de *informes* en torno a la realidad social, que tenía además a la jóvenes trabajadores como protagonistas, que, o bien, serían censurados, o bien, se les negaría las ayudas públicas para continuar posibles futuras investigaciones⁷.

⁵ En nuestro caso seguimos la edición electrónica citada en la *nota 4*.

⁶ James Petras (Boston, 1937) es hoy uno de los más destacados intelectuales norteamericanos antiimperialistas, junto con el propio Noam Chomsky. De origen griego y procedencia de humilde, se licenciaba en sociología por la Boston University y se doctoraba en la University of California. Autor de más de medio centenar de libros y de miles de artículos en las más prestigiosas revistas académicas internacionales y articulista, a su vez, en un sinfín de medios de comunicación, se ha destacado a lo largo de su dilatada carrera académica por sus estudios acerca del imperialismo, la lucha de clases y, concretamente, por el estudio de la evolución –así como de sus consecuencias sociales y políticas– del capitalismo internacional durante las últimas décadas. Como activista a lo largo de estos años, asimismo, se ha visto envuelto en numerosas controversias y campañas de difamación. Entre las obras más destacadas y reconocidas de Petras –además de las que se emplearán en esta investigación– al menos, cabría destacar las siguientes: PETRAS, James, *La historia interminable: sobre democracia, mercado y revolución*, Tafalla (Navarra), Txalaparta, 1994; id., *Escribiendo historias*, Tafalla (Navarra), Txalaparta, 2000; id. y VELMEYER, Henry, *El imperialismo en el siglo XXI: la globalización desenmascarada*, Madrid, Editorial Popular, 2002 [*Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*, Halifax, N.S., Fernwood Pub. 2001]; id. y id., *A System in Crisis: The dynamics of free market capitalism*, Halifax, N.S., Fernwood Pub, 2003 [*El sistema en crisis: dinámica del capitalismo de libre mercado*, Madrid, Editorial Popular, 2004]; id., *Zionism, Militarism and the Decline of US Power*, Atlanta, Clarity Press, 2008; y, id., *Economía política del imperialismo contemporáneo*, Madrid, Maia, 2009. E igualmente, id. y GIORDANO, Eduardo, *Conversaciones con James Petras: la izquierda antes y después de la caída del muro*, Barcelona, Hacer, 1995.

⁷ Uno de los casos más significativos sería, precisamente, la anulación de las *ayudas públicas* que se iban a destinar a la segunda parte de la investigación que en su día coordinara el, COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de], *Condiciones de trabajo de los Jóvenes (1ª fase de investigación). Informe sociológico*, Madrid, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid / Consejo de la Juventud de España, 1989.

En marzo de 1996 y constatado que desde el CSIC no se iba a dar salida editorial mismo, la ahora desaparecida revista *Ajoblanco* lo publicaría parcialmente en su número 29⁸. Una fecha no casual: el 3 de marzo tendría lugar las elecciones legislativas que ganaría el Partido Popular. Tal sería la recepción del mismo que meses después y en un número especial de *Ajoblanco* en el verano en aquel mismo año, se daría a conocer de forma completa. Desde ese mismo momento, entre ediciones en papel y años más tarde en formato electrónico, su popularización alcanzaría cuotas insospechadas.

Si lo anterior ya resultaba atractivo para internarse en el mismo, su lectura terminaría – como decíamos– decantando la temática de esta investigación. Ahora bien, ¿qué venía a decir el *Informe Petras*? Primero, aportaba una *perspectiva disidente* de la que en su día hablara el también norteamericano Michael Parenti⁹. Una *perspectiva disidente* en torno a la “estrategia de la modernización”, en donde Petras desgranaba los principales puntos de apoyo de la política económica liberal de los ejecutivos del PSOE. No era baladí lo dicho. Escaseaban entonces –e incluso hoy nos atreveríamos afirmar– los análisis que fueran más allá de lo comúnmente establecido. Así, por ejemplo, desmenuzaba la propia “lógica coherente en la estrategia de la modernización”, que no era otra que la “liberación de la economía en los primeros 80 era una condición necesaria para profundizar en la división internacional del trabajo”. No sólo, pues, se cuestionaba el principio de la “única política posible”. “Se ha argumentando a menudo que la modernización es la condición *sine qua non* para la consolidación de la democracia en España”, afirmaba Petras, para concluir: “Han surgido suficientes evidencias como para poner en tela de juicio ese supuesto”. Por estos caminos, en suma, se ponía en cuestión el “mito de la modernización” a través de una lectura comprensible, que, en todo caso, iba a chocar con los principios de realidad imperante¹⁰.

Pero el *Informe Petras* era mucho más que una lectura *disidente* o *alternativa*. Contenía tres *ideas-fuerza* –desde una perspectiva gramsciana¹¹– a modo de otras tantas tesis principales, que le terminarían granjeando su merecida “fama”. En primer lugar, describía la situación de las “2 Españas” que se había encontrado al iniciar su investigación. La oficial, la institucional, la de los grandes datos macroeconómicos, y, por otro lado, la que percibía, en su día a día, a nivel de la calle como investigador visitante del CSIC en Barcelona. Una realidad que describiría como la “brecha cada vez más honda entre las élites política dominantes y la masa de trabajadores atomizados”. Hasta tal punto, que decidiría cambiar la estrategia de su estudio “del macro al micronivel, y centrarme en los costes humanos y los destructivos efectos sociales de la modernización a través de la estrategia de la liberalización”¹². A partir de ahí centrarse en el “rostro humano de la modernización de Felipe”. Una hipótesis que tiempo más tarde ha sido traducida como las “víctimas de la modernización” o los “costes sociales y humanos de la

⁸ En torno a su trayectoria hasta convertirse en una revista de referencia central de la llamada “contracultura”, RIBAS, José, *Los 70 a destajo: “Ajoblanco” y la libertad*, Barcelona, RBA, 2007.

⁹ PARENTI, Michael, *La historia como misterio*, Hondarribia, Hiru, 2003, pp. 11 y 15, respectivamente [*History as Mystery*, San Francisco, City Lights Books, 1999]. Del mismo autor, véase también: id., “Objetividad y paradigma dominante” en *La lucha de la cultura*, San Sebastián, Hiru, 2007, pp. 148-160 [*The Culture Struggle*, New York, Seven Stories, 2006].

¹⁰ PETRAS, James, *El informe Petras...*, *op.cit.*, pp. 8, 14 y 49, respectivamente.

¹¹ «No hay en la historia nada absoluto ni rígido. Las afirmaciones del liberalismo son ideas-límite que, una vez reconocidas como racionalmente necesarias, se han convertido en ideas-fuerza, se han realizado en el Estado burgués, han servido para suscitar la antítesis de ese Estado en el proletario, y luego se han desgastado». GRAMSCI, Antonio, “Tres principios, tres órdenes” en *Antología*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006 [1917], p. 19 [selección, traducción notas de Manuel Sacristán].

¹² PETRAS, James, *El informe Petras...*, *op.cit.*, pp. 49 y 6, respectivamente.

modernización”¹³. He aquí una de las primeras razones para deducir el “no” destino editorial del *Informe* a nivel oficial.

Puesto a la tarea enfocaría su estudio en la siguiente dirección: “[E]l impacto de la estrategia de la modernización en dos dimensiones específicas de la estructura social: la calidad de la vida social y de la organización social de dos generaciones trabajadores”. Tocaba, “determinar si había causado un efecto «homogeneizador» o «diferenciador» sobre dos generaciones de trabajadores”. Con respecto a la primera hipótesis no cabía prácticamente ninguna duda: “La modernización modera el discurso y debilita la organización de la sociedad civil”. Se estaba ante un claro debilitamiento de la “cultura cívica”. Otro tanto sucedía con la “calidad de vida social”, a raíz del examen de la realidad sociolaboral del país. El deterioro de las condiciones laborales, sociales, salariales... que allí se describía, constituían el germen de lo que, más adelante, denominaríamos como la “cultura de la precariedad”, entendida esta ya como un fenómeno histórico. Un escenario que categorizado como el “problema de la temporalidad”, comenzaba a ser motivo de preocupación inclusive por las propias administraciones públicas en aquellas mismas fechas¹⁴.

Ahora bien, sería su tesis sobre “la movilidad intergeneracional descendente” acompañada de su también tesis en torno a la “brecha generacional”, la que concentraría todas las atenciones. Lo que allí se decía *blanco* sobre *negro* era una realidad cada vez más perceptible para una parte cada vez más amplia de la clase asalariada, aunque todavía lejos de ser asumida como un hecho social consumado. En esencia, Petras afirmaría como por primera vez una generación de hijos tendría menos posibilidades laborales y unas condiciones de vida peores que la de la generación anterior, dentro del contexto histórico español de la segunda mitad del siglo XX. Un cambio histórico de primera magnitud que, de entrada, chocaba frontalmente con la mentalidad colectiva de buena parte de la sociedad española.

«La mayoría de los trabajadores de edad, sin embargo, tienen un fuerte sentimiento de que se ‘sacrifican’ para dar a sus hijos los que ellos no tuvieron al crecer pobres. La ironía es que los padres esperaban que, con ingresos añadidos, más educación y ambiente familiar estable, los hijos consiguieran más, y alcanzarían un estatus, y empleos mejor pagados. En lugar de eso, los hijos de los trabajadores no pueden lograr siquiera el nivel de seguridad e ingresos de sus padres. La gran paradoja del último cuarto del siglo XX es que las mayores inversiones de la familia en los hijos no pudieron contrarrestar los efectos retrógrados del sistema económico neoliberal, lo cual ha tenido como resultado una tendencia general a la movilidad intergeneracional hacia abajo»¹⁵.

“Dos generaciones de movilidad ascendente han llegado a su final definitivo”, concluía más adelante¹⁶. A ello se añadía la cruda descripción de la realidad sociolaboral vigente —el “mercado de trabajo dual” basado en un “esquema de trabajo: entrada difícil y salida rápida”¹⁷—.

¹³ YSÀS, Pere, “Presentación” en id. (ed.), *La época socialista: Política y Sociedad (1982-1996)*. Dossier monográfico, *Ayer*, n° 84, (2011), pp. 13-21; y, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «cultura de la precariedad» o los «usos y costumbres» de las empresas. Un balance histórico del impacto generacional de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984”, *Sociedad y Utopía*, n° 25 (2005), pp. 19-52.

¹⁴ Sintomático de lo anterior sería el encargo de un *informe* a un conjunto de *expertos* sobre la extensión de la temporalidad, por parte del propio Gobierno socialista a principios de los noventa. Un documento, que en sus duras y realistas conclusiones alertaría de las altas tasas de temporalidad alcanzadas y de sus problemas derivados: SEGURA, Julio, DURÁN, Federico, TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel, *Análisis de la contratación temporal en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.

¹⁵ PETRAS, James, *El informe Petras...*, *op.cit.*, p. 16.

¹⁶ *Ibídem*, p. 28.

¹⁷ *Ibídem*, pp. 28 y 32, respectivamente.

Un proceso que poco tiempo más tarde conduciría a la conocida teorización de los *insiders* y *outsiders*, en relación a la propia lectura de la tesis de la “brecha generacional”¹⁸.

«La clase trabajadora española está profundamente dividida entre una menguante minoría de trabajadores fijos y sindicados, con un salario llevadero y beneficios complementarios, y una masa creciente de trabajadores eventuales que trabajan por el mínimo (o por debajo del salario mínimo) con horarios irregulares (que oscilan entre unas pocas horas a la semana a cincuenta o más) sin beneficios complementarios y totalmente sujetos a los dictados del empresario. Esta división social corresponde en gran parte a una diferencia generacional, que a su vez coincide con los cambios en las estrategias económicas globales»¹⁹.

La tesis del *salto adelante a modo de rana* teorizada por los intelectuales socialistas para glosar las virtudes de la “estrategia de la modernización”, se venía abajo a toda prisa²⁰. No había *salto adelante* sino más bien *salto para atrás* a nivel social, a nivel de movilidad “de clase”, a nivel, inclusive, de derechos sociales y laborales. No sólo, pues si aquello comenzaba a resultar evidente, también se tenía que tener presente una realidad menos perceptible a primera vista: la cada mayor distancia entre los *derechos formales* y los *derechos reales*²¹. Prácticamente por aquellas mismas fechas y en clara alusión a este proceso de cambio social a nivel global, Eduardo Galeano hablaría de cómo los derechos de los trabajadores “ya no pertenece[n] al orden jurídico, sino al campo literario”²².

En este mismo marco, la presencia del razonamiento de Karl Marx se hacía presente: “Aunque una sociedad haya descubierto la *ley natural que presiden su propio movimiento* [...] no puede saltarse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto”²³. Así pues, aquellas mismas realidades –materiales e inmateriales– mal casaban con las narrativas institucionales y el manejo de las grandes cifras macroeconómicas, en donde los políticos y técnicos socialistas se convertirían en consumados especialistas. Un primer y atractivo reto a examinar, pues, siguiendo a Antoine Prost, “[n]uestra obligación es oponer resistencia al prestigio de las autoridades oficiales. Resulta más que necesario no ceder a la sugestión que provocan las cifras precisas”²⁴.

Por último, y volviendo al *Informe*, se estaba ante un “proceso inexorable de homogeneización hacia abajo, que a corto y medio plazo *amenazaba* con afectar a todos los estratos de la clase asalariada, en donde ni siquiera la *clase media* estaba a salvo”²⁵. Intuía, finalmente, James Petras que España constituía un “especial caso avanzado” a modo de

¹⁸ Para todo lo referente a estas cuestiones, GARCÍA de POLAVIEJA, Javier, *Estables y precarios. Desregulación laboral y estratificación en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2003.

¹⁹ PETRAS, James, *El informe Petras...*, op.cit., p. 15.

²⁰ ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de siglo*, Madrid, Alianza, 1992, p. 56.

²¹ LACALLE, Daniel, *La clase obrera en España. Continuidades, transformaciones y cambios*, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo / Fundación de Investigaciones Marxistas, 2006.

²² GALEANO, Eduardo, “Lecciones contra los vicios inútiles” en *Patas arriba La escuela del mundo al revés*, 10ª ed., Buenos Aires, Catálogos, 2006 [1998], p. 176.

²³ MARX, Karl, “Prólogo a la primera edición” en *El capital: Crítica de la economía política*, III vols., Buenos Aires, Siglo XXI, 2004 [1867], vol. I., *El proceso de producción del capital*, p. 8 [cursiva en el texto original].

²⁴ PROST, Antoine, “Los hechos y la crítica histórica” en *Doce lecciones sobre la historia*, Madrid, Cátedra, 2001, p. 77 [*Douze leçons sur l'histoire*, Paris, Editions du Seuil, 1996].

²⁵ Al respecto véase el trabajo del historiador italiano, BOLOGNA, Sergio, “Nuevas formas de trabajo y clases medias en la sociedad posfordista” en *Crisis de la clase media y posfordismo*, Madrid, Akal, 2006, pp. 145-156. Más recientemente, GOUX, Dominique y MAURIN, Eric, *Les nouvelles classes moyennes*, Paris, Editions du Seuil, 2012.

*laboratorio de pruebas*²⁶. Pero más allá de *intuiciones* y *supuestos*, las evidencias contenidas en el informe entregado al CSIC en el final de la primavera de 1995, eran rotundas y al parecer no cuestionables. Así se optaría por guardar en algún cajón aquel informe y esperar a que pasara el tiempo y lentamente se olvidara aquella dichosa e inoportuna invitación al sociólogo norteamericano.

Pero antes de Petras y su *Informe* parte de sus hipótesis habían sido adelantadas en más de una ocasión. Existen, pues, un conjunto de “antecedentes olvidados”, que en parte preparan el contexto político-social en donde el trinomio de la flexibilidad/temporalidad/precariedad, comenzará a entrar lentamente en las “agendas políticas” –en términos de problemas sociales a la par que económicos– así como en las “agendas académicas” –en términos de una nueva problemática que van a cuestionar las categorías socioeconómicas establecidas y mayoritariamente aceptadas–. Antecedentes, en todo caso, que se publicarán en un contexto poco propicio para tales empresas. No sólo por la crisis de los grandes paradigmas –con el marxismo como herramienta metodológica rápidamente arrojada al *basurero de la historia*²⁷– sino por la progresiva modificación a la hora de interpretar lo político, pasando por lo social, hasta lo económico, y que, a su vez, se ha de vincular a nuevas hegemonías y consensos, tanto *políticos* como *académicos*, con cada vez mayor presencia a principios de los años noventa.

Sin desviarnos mucho nuestro camino, estas nuevas hegemonías y nuevos consensos se observan, de forma clara, en el cambio que se opera en las “políticas públicas de juventud”. Si en los ochenta predominarán los *enfoques integrales* centrados en asegurar los procesos de inserción de las nuevas generaciones de trabajadores, al entender la juventud como un problema social de primer orden; en los noventa se van a ir imponiendo –sin aparentes conflictos ni contradicciones– las denominadas *políticas afirmativas* en donde se abandona la perspectiva de influir en las trayectorias laborales, al interpretar la *juventud* como un periodo de vida pleno –la llamada *condición juvenil*– y vincular su transición a la adquisición de la ciudadanía política²⁸. Se trataba, así, de una evolución un tanto contradictoria –desde una lógica mínimamente razonada y razonable–: mientras que la contradicción de las relaciones capital-trabajo no hacía

²⁶ PETRAS, James, *El informe Petras...*, op.cit., p. 17.

²⁷ Al respecto resulta más que ilustrativo leer con atención una de las últimas obras de, HOBBSBAWM, Eric, *Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo, 1840-2011*, Barcelona, Crítica, 2011 [*How to change the World: Tales of Marx and Marxism, 1840-2011*, London, Little Brown, 2011]. Especialmente ilustrativo resulta su primer capítulo: “Marx hoy” (pp. 13-25). Del conocido autor, no deje de consultarse también: id., “El desafío de la razón: Manifiesto para la renovación de la historia”, *Polis: revista académica de la Universidad Bolivariana*, n° 11 (2005). Véase igualmente, EAGLETON, Terry, *Por qué Marx tenía razón*, Barcelona, Península, 2011 [*Why Marx Was Right*, New Haven, Yale University, 2011].

²⁸ Al respecto, SERRANO PASCUAL, Amparo, “Juventud como déficit, juventud como modelo: La construcción de la transición laboral de los jóvenes” en CACHÓN, Lorenzo (dir.), *Juventudes, mercados de trabajo y políticas de empleo*, Valencia, 7 i Mig, 1999, pp. 49-63; REVILLA, Juan Carlos, “La construcción discursiva de la juventud: lo general y lo particular”, *Papers*, n° 63-64, (2001), pp. 103-122; GIMÉNEZ, Laura, “Las políticas de juventud: Hacia unas políticas emancipatorias” en BENEDICTO, Jorge y MORÁN, Mª Luz (eds.), *Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y construcción de ciudadanía entre los jóvenes*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2003 pp. 159-179; y fundamentalmente, MARTÍN CRIADO, Enrique, *Producir la juventud. Crítica de la sociología de la juventud*, Madrid, Istmo, 1998. En relación a la propia evolución de las políticas de juventud: MARTÍN CASTRO, Mª Belén, “Políticas de Juventud en España: Aspectos institucionales y competenciales en un Gobierno multinivel”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, n° 25 (2000), pp. 111-138; BERNALES SASTRE, Josep G., “Políticas de juventud y nueva condición juvenil” en *Discursos y debates en políticas de juventud*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, n° 59, (2002), pp. 50-57. Por último, consúltense los siguientes documentos: COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA JUVENTUD Y LA INFANCIA, *Plan Integral de juventud: políticas para la generación de los 90*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1992; y, INSTITUTO DE LA JUVENTUD, *Informe sobre las políticas de juventud en España*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1999.

más que aumentar, la centralidad del mundo del trabajo, lentamente, desaparecía de los intereses no sólo institucionales sino también de los estrictamente académicos.

Pese a todo, será en este contexto tan poco propicio donde las primeras “voces de alarma” surgirán. Tres casos nos serán más que suficientes. Ya en una fecha tan temprana como en 1989 la investigación del Colectivo IOE, *Condiciones de trabajo de los jóvenes*, vendría a denunciar toda esta situación. A partir de un estudio de campo entre julio a diciembre de 1987, se confrontaría el discurso político-macroeconómico aceptado. La vía: una vez más a través una investigación cualitativa –“investigación alternativa participativa”, la llamaría el propio Colectivo IOE– que evidenciaba la distancia entre ambos mundos: la realidad económica y la realidad social cotidiana. Con la crítica, por delante, al “cuantitavismo ingenuo”, punto por punto, rompería con las visiones predominantes sobre la juventud y el mercado de trabajo, tanto a nivel político como estadístico. Ignoran los clásicos estudios de juventud, afirmaría el Colectivo IOE, un elemento clave: el origen de clase así como las características intrínsecas del “modelo social de acumulación”, lo que conllevaría a una desvinculación analítica a la par que política, de la llamada “condición juvenil” con respecto a las problemáticas relacionadas con su inserción en el modelo de reproducción vigente. Demostrarían, asimismo, como la “cuestión de la clase” era elemental para entender el nacimiento y extensión de la precariedad, a través del “nuevo ejército de reserva” juvenil procedente de finales de los setenta y de los ochenta. Aquel estudio pionero tan contundente en su metodología como en su tratamiento de la centralidad del mundo del trabajo, también aportaba una explicación central a tener en cuenta: la extensión de la precariedad laboral –lejos todavía entonces de ser un hecho social naturalizado– conllevaba el no cuestionamiento del orden social²⁹.

Por aquellas mismas fechas el Consejo de Juventud de España, lanzaba un crítico documento sobre las consecuencias de las reformas laborales socialistas. Titulado, *Bases para una política de empleo juvenil*, se denunciaba allí como el desempleo constituía el verdadero y casi único drama de la juventud española. Con la crítica por delante a las políticas liberales del empleo –juvenil o no– se manifestaba la “incapacidad de las actuales estructuras económicas para garantizar de forma digna el acceso de miles de personas al mercado de trabajo”. “La prácticas fraudulentas y la precariedad de las contrataciones favorecen la explotación como juventud de mano de obra barata”, se señalaba, para a continuación hablar sin tapujos de la degradación de las condiciones laborales. Por primera vez en un documento institucional se indicaba lo siguiente: “Puede decirse que la juventud española evidencia una ruptura intergeneracional profunda”. Y, de nuevo, se apuntaba otra característica clave de este tiempo:

«Semejante situación sólo puede mantenerse a condición de que se haya neutralizado el conflicto, es decir, que se haya neutralizado la tensión y la confrontación que caracterizan las relaciones entre dos generaciones, cuando pugnan por defender o imponer sus propias concepciones sobre la vida y sus pautas de conducta»³⁰.

Asimismo, avanzada la primera década de los noventa del siglo XX, junto con los exámenes en torno a la transmutación sobre los *significados del trabajo*, no faltarían los acercamientos que describieran la “operación”, aparentemente, no conflictiva de la conversión

²⁹ COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de], *Condiciones de trabajo...*, op.cit., pp. 30, 40, 59 y 128, respectivamente. Léase también el capítulo, “II. Interpretaciones de la realidad laboral de la juventud” (pp. 39-61).

³⁰ AHCJE, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA, “Bases para una política de empleo juvenil”, Madrid, Consejo de la Juventud de España, 1989, pp. 5-6 y 9-10, respectivamente, sig. C9.10CONbas [Documento aprobado en la VIª Asamblea del CJE, Valladolid, 287, 28, y 29 de enero de 1989]. Un año más tarde en la revisión de aquel documento base, desde la CJE se llegaría a pedir la derogación del Real Decreto 1989/1984, de 17 de octubre, *por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo* [B.O.E. 9 de noviembre de 1984] –la normativa clave en el nacimiento de la ‘cultura de la precariedad’–. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA, *Bases para una política de empleo juvenil*, Madrid, Consejo de la Juventud de España, 1990, p. 102.

de los *obreros en ciudadanos*³¹. Sería el ya desaparecido Andrés Bilbao quien desmontaría tal *operación*, evidenciando los “peligros” de la sustitución/conversión de los derechos laborales por los derechos ciudadanos. Así afirmarí­a:

«La noción de ‘obrero’ está estrechamente asociada a las determinaciones sociales del proceso de producción [...]. El ciudadano se determina como miembro de la comunidad política ajeno a cualquier referencia al proceso de producción [...]. El universo social de la teoría económica que hace del mercado el regulador único y exclusivo tiene, obviamente, en la universalización del ciudadano la [nueva] condición social»³².

Su hoy recordada obra, *Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera*, alertaba también de las consecuencias de la instalación de un nuevo paradigma, que venía a desvincular del análisis social la cuestión de la centralidad del mundo de trabajo³³. En cualquier caso, la tantas veces anunciada desaparición de la “clase obrera” como sujeto político y social de primer orden, no daría paso –excepto en ocasiones muy limitadas– al examen de la formación histórica de un “nuevo precariado”³⁴. Poco a poco, el *ángulo de visión* se centraría casi exclusivamente en la ciudadanía –así como de los *nuevos* movimientos sociales, en

³¹ Referencias básicas: CASTILLO, Juan José, “El significado del trabajo hoy”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 82, (1998), pp. 215-230; ALONSO, Luis Enrique, *Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial*, Madrid, Trotta, 1999. Unos años antes desde Italia: ACCORNERO, Aris y MAGNA, Nino, “El trabajo después de la clase obrera”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 38, (1987), pp. 75-92.

³² BILBAO, Andrés, *Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera*, 2ª ed., Madrid, Trotta, 1995 [1993], p. 10. Un proceso cada vez más atendido desde el campo del conocimiento histórico. Dos ejemplos relevantes en: PÉREZ LEDESMA, Manuel, “El lenguaje de la ciudadanía en la España contemporánea” en id. (dir.), *De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 445-481; y concretamente en: GABRIEL, Pere, “Hablemos de los trabajadores y de la clase obrera” en RIVERA, Antonio, ORTIZ DE ORRUÑO, José Mª y UGARTE, Javier (eds.), *Movimientos sociales en la España Contemporánea*, Madrid, Instituto Universitario de Historia Social / Asociación de Historia Contemporánea / Abada, 2008, pp. 127-168. Y, por último, MOSCOSO, Leopoldo, “De Trabajadores a Ciudadanos y Viceversa. La Crisis del Trabajo en la perspectiva de dos fines de siglo”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XXI, n° 1 (2003), pp. 13-32.

³³ Como recordarían en su momento Joaquín Arriola y Luciano Vasapollo: «El trabajo como fuente de sentido, de identificación de los otros y de identidad social es un valor común de lo que constituye el sustrato de la humanidad, del ser social. En todas las épocas, el trabajo ha sido el factor desencadenante del progreso en la evolución humana y en su socialización, esto es, el principio activo en la formación de la humanidad. Ahora bien, al mismo tiempo, en cada momento histórico, en torno al trabajo se han establecidos los vínculos sociales que han determinado el establecimiento de estructuras jerárquicas y de dominación diversas. Por eso, el análisis del trabajo es capital en la comprensión de cualquier época o periodo histórico». ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios. La opresión del trabajo en el nuevo capitalismo europeo*, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo, 2005, p. 7 [*L'uomo precario. Nel disordine globale*, Milano, Jaca Book, 2003].

³⁴ RÍO, Eugenio del, *¿Ha muerto la clase obrera?* Madrid, Revolución, 1989; DÍAZ-SALAZAR, Rafael, *¿Todavía la clase obrera?* Madrid, HOAC, 1990; RECIO, Albert, “¿Qué fue de la clase obrera?”, *Mientras Tanto*, n° 93, (2004), pp. 25-43. Incluso el mismo Robert Castel no dejaría de formularse la *pregunta de rigor*: “¿Por qué la clase obrera ha perdido la partida?” en DÍAZ-SALAZAR, Rafael (ed.), *Trabajadores precarios. El proletario del Siglo XXI*. Madrid, HOAC, 2003, pp. 169-179. Aquí también, BABIANO, José, “Argumentando, una vez más, sobre sí existe la clase obrera” en DELGADO, Santiago y VÉLEZ, Antonio J. (eds.), *El futuro del sindicalismo*, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1996, pp. 75-83. A finales de los cincuenta Michel Crozier ya hablaría en los siguientes términos: «Una fase de nuestra historia social debe cerrarse definitivamente, la fase religiosa del proletariado». CROZIER, Michel, “Qu'est-ce que la classe ouvrière française?”, *Arguments*, número especial, (1959), p. 3 [traducción del autor]. Consúltese también aquí, MANDEL, Ernest y NOVAK, George, *On The Revolutionary Potential of the Working Class*, New York, Pathfinder Press, 1974.

sustitución del propio movimiento obrero³⁵ – desde una perspectiva sociocultural. Un paradigma hoy dominante y que ha sido teorizado por Alain Touraine como el paso del *económico* y *social* al *cultural*. Autor quien *alegremente*, además, daba por finalizados los “conflictos de clase” de la sociedad industrial³⁶.

Así pues, *algo se movía* antes del *Informe Petras*. Y, sin embargo, ninguno de los casos expuestos llegaría alcanzar su notoriedad. ¿Por qué? Complicada respuesta. Quizás las extrañas circunstancias en que se publicaría *Padres-Hijos: Dos generaciones de trabajadores españoles*, así como el momento político elegido, y claro está las conclusiones radicales allí contenidas – lejos de ciertos “tonos académicos” – estarían, a la postre, detrás de su amplia difusión.

Lo cierto es que a partir de mediados de los noventa a nivel internacional la especificidad del “caso español”, proporcionaba signos palpables de ser un fenómeno universal antes que un “caso aislado” dentro de las sociedades occidentales avanzadas. Cuando todavía faltaba no poco tiempo para que las tesis de Petras dejaran de contener su *aspecto subversivo* en nuestro caso, la proliferación de un conjunto de obras “cumbres” vendrían a constatar aquellas nuevas realidades históricas. De la mano de los sociólogos llegarían la mayoría de estos títulos. En este lento cambio de opinión y percepción colectiva la obra de Robert Castel, *La metamorfosis de la cuestión social* se transformaría en el gran punto de inflexión. Bajo el subtítulo, *Crónica de un asalariado*, diseccionaría magistralmente la nueva realidad social y económica que se iba imponiendo. El sociólogo francés no sólo anunciaría el freno de los “logros de la sociedad”, sino el derrumbamiento de los puntos de sujeción de la “cuestión social”. “La idea misma del progreso se ha derrumbado” como fenómeno histórico consumado. Por otro lado, la idea de la “centralidad del trabajo ha sido brutalmente cuestionada”, señalaría Castel para a su vez anunciar como se trataba de un “proceso [que] parece irreversible”. Todo lo cual le llevaría a formular un interrogante a raíz la contradicción principal que observa en ese mar de cambios: “¿Cuál es el umbral de tolerancia de una sociedad democrática a la que yo llamaría, más que exclusión, invalidación social? Ésta es a mi juicio la nueva cuestión social”³⁷.

A sustentar y afianzar las lecturas *disidentes* acerca de los cambios sociales globales contribuirían decisivamente otras dos obras. La primera la de Richard Sennett, basada –una vez más– en una visión cualitativa en este caso de la realidad laboral norteamericana. Con *La*

³⁵ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “«Nuevos» y «viejos» movimientos sociales en la transición” en MOLINERO, Carme (ed.), *La transición, treinta años después*, Barcelona, Península, 2006, pp. 117-151. En cualquier caso, se hablará largo y tendido sobre esta misma cuestión en el Capítulo “3. A vueltas con la historia social: debates, controversias y dilemas del historiador social hoy en España”.

³⁶ TOURAINE, Alain, *Un nuevo paradigma: para comprender el mundo hoy*, Barcelona, Paidós, 2005 [*Un nouveau paradigme: Pour comprendre le monde d'aujourd'hui*, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2005]. «¿Quiere eso decir que ya no hay aquí relaciones de dominación? No, desde luego. Pero conflictos de clase, si todavía se los puede llamar así, se sitúan en los sucesivos en el nivel de la gestión global, sobre todo financiera, más que en el nivel del trabajo y de la organización de la producción». *Ibidem*. Otra visión en: KERBO, Harold R. y CASADO, M^a Teresa, *Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica comparada y global*, 5^a ed., Madrid, McGraw Hill Interamericana, 2003 [*Social stratification and inequality. Class conflict in historical perspective and global comparative*, 5th ed., New York, McGraw Hill, 2003].

³⁷ CASTEL, Robert, *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Buenos Aires, Paidós, 2004, pp. 387, 389, 405 y 23, respectivamente [*Les métamorphoses de la question sociale: une chronique du salariat*, Paris, Arthème Fayard, 1995]. Del mismo autor, *El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatutos del individuo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010 [*Le montée des incertitudes: Travail, protections, statut de l'individu*, Paris, Éditions du Seuil / Les Couleurs des Idées, 2009]. También aquí se han de tener muy presentes los trabajos de Louis Chauvel, quien ha venido incidiendo, en base al estudio del propio caso francés, en el cambio social y generacional en aquella misma sociedad a partir de los efectos de la precarización laboral, relacionados, a su vez, con la propia metamorfosis de la cuestión social descrita por el propio Castel: CHAUVEL, Louis, *Le Destin des générations. Structure Sociale et cohortes en France au XXe siècle*, Paris, Presses Universitaires de France, 1998; y *id.*, *Les Classes moyennes à la dérive*, Paris, Seuil, 2006.

corrosión del carácter, el sociólogo norteamericano, destripaba las consecuencias de la imposición de la “lógica liberal de la flexibilidad”, a través del seguimiento de un conjunto de biografías laborales totalmente desestructuradas y marcadas por la inseguridad, la provisionalidad y la temporalidad –a modo de aquella conocida expresión de Engels cuando hablaba de la *incertidumbre de la existencia*³⁸–. “[E]l termino flexibilidad se usa para suavizar la opresión que ejerce el capitalismo”, concluiría el propio Sennett³⁹. En segundo lugar, otra brillante descripción vendría de la mano de Ulrich Beck. Su libro, *Un mundo feliz*, se abría con su sugerente tesis de la “brasileñización de occidente”. El sociólogo alemán leía como un éxito del nuevo capitalismo la imposición de la flexibilización/precariedad, dentro de la denominada *new economy* que había dado lugar al “modelo de acumulación flexible”⁴⁰. “La creciente tasa de paro no se puede seguir achacando a crisis económicas cíclicas, sino a los éxitos de un capitalismo tecnológicamente avanzando”, aseveraría, para plantear a continuación su conocida tesis de la “sociedad del riesgo”: “Consecuencia: cuantas más relaciones laborales se «desregularizan» y «flexibilizan» más rápidamente se transforma la sociedad laboral en una sociedad de riesgo”. A partir de donde se constaba como se trataba de: “un riesgo que no es calculable ni para el modo de vida de cada individuo ni para el Estado y la esfera política”⁴¹.

En gran medida, los anteriores postulados nos llevarían a las consecuencias inevitables de lo que Zygmunt Bauman –quien vendrá, a su vez, a rescatar los postulados de Hannah Arendt– describiera con precisión como la “modernidad líquida”. Todo ello una vez que el nuevo capitalismo se hubiera impuesto de forma globalizada. Momento a partir del cual la ruptura de los vínculos entre individuo y comunidad, habría dado paso a la generalización de la inseguridad personal y vital⁴².

Los análisis de aquellos intelectuales más pronto o más tarde serían confirmados por los grandes organismos económicos mundiales. Instituciones como la OIT⁴³ y la OCDE alertarían

³⁸ ENGELS, Friedrich, *Introducción a la dialéctica de la naturaleza: el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre*, [Madrid], Ayuso [1974] [1875/1876].

³⁹ SENNETT, Richard, *La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo*, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 10 [*The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*, New York, W. W. Norton & Company Inc., 1998].

⁴⁰ Un estudio de caso para España, en donde se desmenuzan todas estas características en: COLLER, Xavier, *La empresa flexible. Estudio sociológico del impacto de la flexibilidad en el proceso de trabajo*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1997.

⁴¹ BECK, Ulrich, *Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización*, Barcelona, Paidós, 2000, pp. 10 y 11, respectivamente [*Schöne neue Arbeitswelt*, Suhrkamp, Frankfurt and Main, 1999]. Y, id., *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*, Barcelona, Paidós, 1998 [*Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Suhrkamp, Frankfurt and Main, 1986].

⁴² BAUMAN, Zygmunt, *Modernidad líquida*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003 [*Liquid Modernity*, Cambridge, Polity Press / Blackwell Publishers Ltd., 2000]. Del mismo autor, id., *Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil*, Madrid, Siglo XXI, 2003 [*Community: Seeking Safety in a Insecure World*, Cambridge, Polity Press, 2001].

⁴³ Desde 1989, al menos, la Organización Internacional del Trabajo comenzaría a mostrar su preocupación por la tendencia descrita, hablando de la necesidad de (re)construir una lógica tendente al *trabajo decente* (*decent work*) a nivel mundial –al respecto, consúltese “El programa de Trabajo Decente” [www.ilo.org]; y concretamente, id., *Empleo de los jóvenes: vías para acceder a un trabajo decente*, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2005; y, id., *Tendencias mundiales del empleo juvenil: octubre de 2008*, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2008–. Desde entonces hasta el presente no ha dejado de evidenciar, a través de múltiples estudios, los costes de las políticas laborales liberales. Véanse: RODGERS, Gerry y RODGERS, Janine (comps.), *El trabajo precario en la regulación del mercado laboral. Crecimiento del empleo atípico en Europa Occidental*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992 [*Precarious job in labour market regulation: The growth of atypical employment in Western Europe*, Genève, International Labour Organization, 1989]; O’HIGGINS, Niall, *Desempleo juvenil y política de empleo. Una perspectiva global*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001 [*Youth employment and employment policy. A global perspective*, Genève, International Labour

de la gravedad del crecimiento de la precariedad laboral, a principios de la década de los noventa. Precisamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en consonancia con las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, desde mediados de los 1970, se había convertido en una de las principales impulsoras de la flexibilidad y de la moderación a ultranza de cualquier política de rentas. Significativo al respecto serían las conclusiones y recomendaciones contenidas en su informe de 1982, *El desafío del empleo*⁴⁴. Otro tanto sucedería con un informe presentado con la Consejera Privada de la Corona Británica, que titulado, “Los grandes problemas económicos y sociales y el paro juvenil”, y a pesar de titularse “políticas de empleo a favor de los jóvenes”, aconsejaría fervientemente –en el primer lustro de los ochenta– la implantación del modelo norteamericano de empleo a nivel global⁴⁵. Las recomendaciones tanto de la OCDE, BM o del FMI, a través de centenares de informes y documentos –un último ejemplo altamente significativo lo podemos encontrar en el informe de la OECD, *Off to a good start? Jobs for youth*⁴⁶– terminarían por convertirse en las verdaderas guías de actuación por parte de los poderes públicos a lo largo de la década de los años ochenta, como tiempo habrá de examinar.

A nivel global comparado dentro de los países capitalistas avanzados, poco más de una década sería más que suficiente para que la imposición del “dogma de la flexibilidad” mostrara sus devastadores efectos, tanto a nivel de derechos, de cifras como de problemas de nuevo orden impensables poco tiempo antes. Asimismo, ni el empleo se había recuperado a nivel internacional, ni las tasas de ganancia del capital habían alcanzado los niveles anteriores a la crisis de los setenta⁴⁷. Pese a reconocerse de forma siempre parcial tal situación en varios informes de la OCDE a finales de los ochenta, el diagnóstico y el pronóstico sobre el mercado de trabajo apenas se modificaría en los noventa –muy interesante al respecto resulta el informe de la OCDE, *Políticas de mercado de trabajo en los noventa*⁴⁸–. La receta seguiría siendo la misma: incrementar la flexibilidad y otorgar un mayor poder discrecional a las empresas. El *dogma* de los ochenta había transmutado en una parte central de la “ideología dominante”, tal y como lo describieran en su momento Pierre Bourdieu y Luc Boltanski⁴⁹. Así pues, se estaba

Organization, 2001]. Para el caso español, BAEZA, Ramón, ROCHA, Fernando y LLOPIS, Elvira S., “El trabajo decente en España 2011”, *Informes de la Fundación 1º de Mayo*, nº 41, (2011). Otras aproximaciones al respecto en, CANESSA MONTEJO, Miguel F., “Los derechos humanos laborales: el núcleo duro de derechos (*core rights*) y el «ius cogens» laboral”, *Revista del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 72, (2008), pp. 111-151.

⁴⁴ OCDE, *El desafío del paro*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984 [*The Challenge of Unemployment: A Report to Labour Ministers*, Paris, OECD, 1982].

⁴⁵ WILLIAMS, Shirley, “Los grandes problemas económicos y sociales y el paro juvenil” en OCDE, *Jóvenes sin empleo. Tres estrategias. Informe de Shirley Williams y otros expertos*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984, pp. 9-34 [*Youth Without Work: Three countries approach the problem*, Paris, OECD, 1982]. Véase, igualmente, la recopilación de estudios, OCDE, *La naturaleza del desempleo de los jóvenes*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986 [*The Nature of Youth Unemployment. An Analysis for Policy-Makers*, Paris, OECD, 1984]. En esta misma línea, a modo de balance general, BLANCHFLOWER, David G. y FREEMAN, Richard B. (eds.), *Youth Employment and Joblessness in Advanced Countries*, NBER, Chicago University Press, 2000.

⁴⁶ OECD, *Off to a good start? Jobs for youth*, Paris, OECD, 2010.

⁴⁷ En concreto, para el caso español véase la sintética como aclaratoria aportación de, NIETO FERNÁNDEZ, Maximiliano, “Rentabilidad y distribución en el capitalismo español (1954-2003)”, *Laberinto*, nº 24, (2007), pp. 71-77. En el apartado “2.2.1. Ciencias económicas: un campo de batalla entre interpretaciones radicalmente diferentes entre sí”, se volverá sobre esta cuestión con mayor detenimiento.

⁴⁸ OCDE, *Políticas de mercado de trabajo en los noventa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991 [*Labour Market Policies for the 1990s*, Paris, OECD, 1990].

⁴⁹ BOURDIEU, Pierre y BOLTANSKI, Luc, “La production de l'idéologie dominante”, *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. II, nº 2-3, (1976), pp. 4-73.

también ante lo que el propio Karl Marx denominara como la “coerción sorda de las relaciones económicas”⁵⁰.

De regreso al caso español, desde el *Informe Petras* no han faltado los estudios, los informes de expertos –a nivel institucional, sindical o privado– y un sin fin de documentos, que, uno tras otro, han terminado por confirmar lo que en su día adelantaría el sociólogo norteamericano⁵¹. Incluso, el que sería definido en su día por José Luis López-Aranguren como el “intelectual colectivo” de la nación⁵², *El País*, tras popularizar el término de la *generación mileurista*⁵³, llegaría a reconfirmar la mayor parte de las propias tesis de James Petras en estos

⁵⁰ MARX, Karl, *El capital...*, *op.cit.*. Así mismo, Marx junto con Engels examinarían con detenimiento el peso de las ideologías dominantes como uno de los elementos centrales de las relaciones de producción en: id y ENGELS, Friedrich, *La ideología alemana*, 5ª ed., Barcelona, Grijalbo, 1972 [1845/1846]. Libro central en donde formularían una de sus textos clásicos, que comenzaba de la siguiente manera: «Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder *material* dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder *espiritual* dominante». *Ibíd.*, pp. 50-51.

⁵¹ Junto con lo ya anotado en la *nota 14*, en primer término, se ha de citar uno de los informes ‘oficiales’ de *expertos* más clarificadores sobre la extensión y los efectos de la temporalidad contractual, tras más de dos décadas desde la publicación en el B.O.E. de la Ley 32/1984. Vaya por delante, en cualquier caso, que excepto en ocasiones contadas, estos denominados *expertos* han procedido, en términos generales, de la *escuela liberal*: CRUZ VILLALÓN, Jesús, DURÁN, Federico, JIMENO, Juan Francisco, OLALLA, Miguel Ángel, RUESGA, Santos M., SÁEZ, Carmen, TOHARIA, Luis y VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, *Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas. Informe de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005. Entre otros muchos documentos relevantes, valga por el momento, el trabajo cualitativo de, SÁNCHEZ MORENO, Esteban, “Jóvenes: la nueva precariedad laboral. La experiencia de la precariedad laboral en los jóvenes españoles”, *Cuadernos de Información Sindical de Comisiones Obreras*, nº 54, (2004); así como el estudio de primer orden de, TOHARÍA, Luis (dir.), *El problema de la temporalidad: un diagnóstico*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.

⁵² LÓPEZ ARANGUREN, José Luis, “*El País* como empresa e «intelectual colectivo»”, *El País*, 7 de junio de 1981.

⁵³ En la última década –por no retroceder atrás en el tiempo– las categorizaciones sobre esta generación –a modo de mero etiquetaje– no han dejado de sucederse. En la mayor parte de los casos, las mismas han respondido a criterios del ‘buen gusto’ periodístico antes que a razones epistemológicas con fundamento. Si ya en su momento catalogar a los jóvenes dentro de la ‘generación mileurista’ resultaría todo un despropósito –tal y como se puede comprobar en, HIDALGO VEGA, Álvaro y PÉREZ CAMARERO, Santiago, *Aspectos salariales de los jóvenes trabajadores*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2004; y en, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, *El papel de la juventud en el sistema productivo español*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2005 [*Sesión ordinaria del Pleno de 21 de diciembre de 2005*]– una de las últimas ha terminado por resultar, quizás, la más ‘escandalosa’: la ‘generación Ni-Ni’ (con programa televisivo incluido) –al respecto, ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE DOCTORALES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, *Desmontando a ni-ni. Un estereotipo juvenil en tiempos de crisis*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2011–. No han faltado tampoco, las correspondientes publicaciones –entre la mera literatura de refrito y algún que otro ensayo más o menos atento a las circunstancias–: FREIRE, Espido, *Mileuristas. Retrato de la generación de los mil euros*, Barcelona, Ariel, 2006; GARCÍA ALLER, Marta, *La generación precaria*. Madrid, Espejo de Tinta, 2006. Libros, reconcentrados exclusivamente en el segmento de la población juvenil de la clase media. Por lo demás, un recorrido por las múltiples definiciones que han empleado en las últimas décadas: AGULLÓ TOMÁS, Esteban, *Jóvenes, trabajo e identidad*, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1997, y en concreto en, “Introducción” (pp. 1-9). Sobre este proceso de *etiquetaje*, junto con los libros ya citados de, COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de], *Condiciones de trabajo...*, *op.cit.*; y, MARTÍN CRIADO, Enrique, *Producir la juventud...*, *op.cit.*; véase, BILBAO, Andrés, “La utilización ideológica de los jóvenes” en TORREGROSA, José Ramón, BERGERE, Joelle y ESTRAMIANA, José Luis A. (eds.), *Juventud, trabajo y desempleo: Un análisis psicológico*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1989, pp. 59-65 [*Trabajos presentados en el Simposio Internacional sobre Juventud, Trabajo y Desempleo*, celebrado en Toledo en diciembre de 1986].

últimos años a través de dos series de amplios reportajes. La primera serie llevaría por título *Preparados*, y se publicaría desde el otoño de 2010⁵⁴. Reportajes, con cierto *toque paternalista*, que a través de la disección de unas biografías laborales-vitales de un conjunto de jóvenes, en general, bien *preparados* y mejor *formados* –y por tanto, representativos de una parte muy concreta de la población juvenil trabajadora, precisamente, la de los estratos bajos-medios– constataban, en primer persona, su incierto futuro y los problemas reales y palpables de la sobrecualificación educacional. En aquella ocasión, antes de presentarse dicha cuestión como un problema social y económico, venía a sustentarse el asunto en un problema de tintes generacionales.

Tiempo más tarde, en marzo de 2012, inauguraría otra serie de reportajes que titulados *#nimileuristas. La precariedad bloquea a la generación mejor preparada*, llegaba en plena crisis económica, con los más altos niveles de desempleo juvenil y de precariedad laboral que la sociedad española contemporánea haya conocido⁵⁵. Aunque en aquella ocasión se mantendría el *tono paternalista* consabido, la percepción e interpretación en torno al futuro de aquella *generación de jóvenes* trabajadores o desempleados, había variado muy considerablemente. De mero problema generacional se había pasado a un problema económico de primer orden –calificándose como un “fracaso colectivo”– y que además podía derivar en un conflicto social, según se señalaba en el editorial que acompañaría aquel bloque de reportajes⁵⁶. Más allá de las decenas de testimonios que los propios (auto)considerados *precarios* enviarían a la redacción del periódico, se sumarían no pocos reportajes que a la par que exponían las vivencias de este nuevo sujeto histórico, incidían –entre la información y la mera opinión– en las dificultades de asumir la tesis de que dicha generación viviría peor que la de sus padres –todo ello dentro de la propia línea editorial del medio de comunicación citado–. Un conjunto de opiniones que no sólo echaban por tierra más de veinte años de sociología del trabajo y otras investigaciones, sino que además trataban de fundamentarse en elementos subjetivos antes que empíricos o estrictamente estadísticos, a partir de las mayoritarias declaraciones de los *expertos liberales* correspondientes, que a su vez contrastaban con las escasas opiniones *disidentes* o *críticas*⁵⁷. Un balance que, incluso, contrariaba los datos de opinión encargados por *El País* a Metroscopia y en donde el 75% de los entrevistados afirmaban que “vivirán peor que sus padres” y el 70% de las calificadas personas “mayores” así también lo creían⁵⁸. Fuera como fuese, el precariado pasaba –gracias a su *salto* a la primera páginas de los principales medios de comunicación– de ser una mera categoría económica y social a adquirir la condición de sujeto político-social. Un *sujeto* cada vez más amplio, cada vez más representativo, dentro de una parte no desdeñable de la clase trabajadora.

De esta forma, década y media después de la aparición de *Padres-Hijos: Dos generaciones de trabajadores españoles*, la cruda y realista visión que allí se describía cobraba

⁵⁴ Todos los reportajes citados se pueden localizar en: www.elpais.com/especial/preparados.

⁵⁵ Todas las noticias, reportajes, testimonios y artículos de opinión están en línea en, www.politica.elpais.com/politica/nimileurista.html.

⁵⁶ «El desempleo y la extraordinaria precariedad laboral que sufren los jóvenes españoles son síntomas de un fracaso colectivo que no solo empobrece a los afectados. La falta de perspectiva laborales y, por tanto, vitales es un drama español de carácter endémico que la crisis y la actual recesión han agudizado hasta extremos insostenibles [...]. Esa falta de perspectivas es un peligroso caldo de cultivo para el conflicto social y una pérdida irreparable para todo un país». Editorial, “Frustración juvenil”, *El País*, 11 de marzo de 2012.

⁵⁷ Entre las ‘voces liberales’ consultadas en aquella ocasión estarían, entre otros, Javier Andrés, Florentino Felgueroso o Juan José Delgado [véase su artículo en esa misma serie de reportajes, “¿De la leyenda urbana al drama social?”, *El País*, 19 de marzo de 2012]; en cuanto a visiones críticas la colaboración de uno de los mayores expertos resultaría aclaratoria: SÁNCHEZ MORENO, Esteban, “Aplastadas por la juventud”, *El País*, 20 de marzo de 2012.

⁵⁸ Datos extraídos de, Reportaje, Carmen Pérez-Lanzac, “Generación «nimileurista»”, *Domingo. El País*, 11 de marzo de 2011.

visos de realidad social generalizada. Un fenómeno histórico asumido de izquierda a derecha⁵⁹, e incluso retratado en *novelas* de la antes llamada “literatura social”⁶⁰. Concluía, de este modo, una *singular transición*: el paso de una extendida incredulidad –repleta de *silencios* y *sobreentendidos*– en torno lo que rodeaba y afectaba a un segmento considerable de la población asalariada; a la constatación de una evidencia tozuda.

Pero, ¿por qué se ha tardado tantos años en reconocerse tal fenómeno socioeconómico, hoy convertido en una realidad histórica contrastable? Una posible respuesta: reconocer las propias tesis de Petras y de otros tantos, era reconocer que el sistema en su conjunto había fracasado. Tanto desde la perspectiva del –supuesto– “consenso socialdemócrata” como desde el ángulo liberal-conservador y hegemónico por extensión. En gran medida, lo anterior ha supuesto un largo proceso de asimilación social inmenso, que leídos en términos mayoritariamente de *fracaso* o *derrota*, hoy es compartido por la inmensa mayoría de las generaciones activas. Llegados aquí, probablemente, la respuesta más honesta a lo descrito la proporcionaría el desaparecido historiador británico Tony Judt en su obra póstuma cuando hablaba de la *desigualdad creciente*: “No sabemos qué mundo van a heredar nuestros hijos, pero ya no podemos seguir engañándonos con la suposición de que se parecerá al nuestro”⁶¹.

Nos encontramos, pues, ante un cambio social inmenso, que rompe los grandes esquemas de pensamiento de las sociedades occidentales capitalistas procedentes de la segunda mitad del siglo XX. Pero ante todo nos situamos frente a las verdaderas causas-efectos de la salida (neo)liberal casi universal, que se adopta de forma ya decidida a finales de los setenta, y que será bautizada por Margaret Thatcher como “There is no alternative”. Frase reconvertida con notable éxito de mercado en el acrónimo TINA⁶². Desde su llegada al poder en mayo de 1979, junto con la de Ronald Reagan en enero de 1981, se daría paso a la “marcha triunfal” de la Escuela de Chicago de la mano de Milton Friedman como gran ideólogo y gurú. Una nueva versión “fundamentalista del capitalismo” –como lo definiera Naomi Klein– se impondría a escala global. Y lo haría mediante *terapias de shock* en su “versión democrática”, tras la exitosa experiencia del golpe militar en Chile de septiembre de 1973⁶³.

⁵⁹ Por ejemplo, desde posiciones socialdemócratas en estos últimos años se ha venido analizando este proceso histórico vivo. Todo ello, por más que en tiempos anteriores, los propios ahora interesados – en su mayoría intelectuales procedentes de los aparatos de poder político-intelectual de los gobiernos socialistas– negarán, por activa y por pasiva, que la modernización socialista hubiera conllevado algún tipo de desequilibrio económico o social. Un caso, altamente significativo, en: TEZANOS, José Félix (ed.), *Juventud y exclusión social. Decimo Foro sobre Tendencias Sociales*, Madrid, Sistema, 2003. Inclusive una de las revistas de referencia de la Fundación Pablo Iglesias, *Sistema*, dedicaría un amplio y valioso dossier monográfico (nº 197-198, (2007)) al respecto.

⁶⁰ Por otro lado, muy representativo de todas estas transformaciones resulta la obra novela de, ROSA, Isaac, *La mano invisible*, Barcelona, Seix Barral, 2011.

⁶¹ JUDT, Tony, *Algo va mal...*, op.cit., pp. 34 y 204, respectivamente. El mismo autor confirmaría la tesis de Petras: «Las consecuencias están claras. La movilidad intergeneracional se ha interrumpido: al contrario que sus padres y abuelos, en Estados Unidos y el Reino Unido los niños tienen muy pocas expectativas de mejorar las condiciones en la que nacieron». Ibídem, p. 28. Para el caso español, consúltense los datos aportados en: ECHEVERRÍA, Javier, *La movilidad social en España (1940-1991)*, Madrid, Istmo, 1999.

⁶² Consúltense la biografía de, BERLINSKI, Claire, *There is no Alternative: Why Margaret Thatcher Matters*, New York, Basic Books, 2008.

⁶³ *La doctrina del Shock* de Naomi Klein ha generado todo tipo de reacciones a favor y en contra. Cuanto menos, aporta una singular como interesante perspectiva del funcionamiento intrínseco de esta última etapa de la historia del capitalismo. «Cualquier estrategia basada en la explotación de la venta de oportunidad que surge a raíz de un *shock* traumático descansa en gran medida en el elemento sorpresa. Un estado de *shock*, por definición, es un momento en que se produce una pausa entre acontecimientos que se están sucediendo a gran velocidad y la información existente acerca de ellos». KLEIN, Naomi, *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*, Barcelona, Paidós, 2007, pp. 27, 31, 595 y 596, respectivamente [*The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism*, Toronto, Random House of

Dentro de este marco general, la especificidad del caso español es evidente: la *salida liberal* de la crisis de los setenta y que se iba a prolongar en el tiempo durante los primeros años ochenta del siglo XX, se produciría bajo un Ejecutivo Socialista –típico del denominado socialismo del Sur de Europa– aunque con muy similares recetas a la de los gobiernos conservadores-liberales europeos⁶⁴. He aquí una de las primeras “tesis fuertes” que se presentan esta investigación. Frente a la idea común y extendida que los gobiernos socialistas tendrían una orientación socialdemócrata o al menos progresista en materia económica, se presentarán las suficientes evidencias empíricas que, por el contrario, mostrarán como la misma no varió en lo fundamental de las recetas internacionales inspiradas en la “contra-revolución” conversadora.

En el siempre complejo terreno de las imágenes colectivas comunes y mayoritarias, ha de tenerse presente, primero, como el periodo central de la presente tesis –denominada como “la década del cambio socialista” por los propios intelectuales orgánicos del socialismo español⁶⁵– sigue formando parte de un *anexo* del relato canónico de la transición, aunque, ciertamente, peor construido y más débilmente asentado a nivel institucional. Un *anexo* apoyado en dos puntos. Primero, por una memoria social mayoritaria de aquel tiempo a través de una visión positiva –o cuando menos “acrítica”– (periodo reformista-progresista, la irrefutable necesidad de la única política posible de la modernización, *el salto adelante...*). El segundo punto de sujeción se encontraría asistido por un débil “consenso historiográfico”. ¿Por qué débil? Tres razones nos asisten. Primero, se puede hablar de una falta de estudios a nivel historiográfico, que hayan ido más allá de los espacios conocidos. Es decir, han predominado en la mayor parte de los casos relatos demasados *amables* de unos historiadores asentados, generalmente, en su “comodidad corporativa”⁶⁶. Investigadores, en no pocos casos, que deslindaron hace tiempo su trabajo académico de la propia función social que debería estar presente en la labor del historiador”⁶⁷. En segundo término, lo que realmente abundan son antes los ensayos memorialísticos que estrictamente los estudios históricos. Y, por último, se trata de un periodo huérfano de debates. Incluso se podría hablar, sin riesgo a equivocarnos, de la falta definida de líneas de investigación al respecto.

Canada Limited, 2007]. Una completa visión a largo plazo en: WALLERSTEIN, Immanuel, *Historical capitalism with Capitalist Civilization*, 2ª ed., London, Verso, 2003. Y asimismo, PECK, Jamie, *Constructions of neoliberal reason*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

⁶⁴ Un estudio comparativo entre las políticas de los gobiernos socialistas en perspectiva internacional con otros casos –con especial atención al británico– en, BOIX, Carles, *Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial*, Madrid, Alianza, 1996.

⁶⁵ TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del cambio. Diez años de Gobiernos socialistas, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992, pp. 21-56.

⁶⁶ CHESNEAUX, Jean, *¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia y de los historiadores*, 6ª ed., Madrid, Siglo XXI, 1984, p. 21 [*Du passé faisons table rase?* Paris, Librairie François Maspero, 1976]. Un ejemplo, entre otros muchos, de esta *amabilidad* con respecto a este periodo lo proporcionaría Álvaro Soto Carmona en la introducción a un *dossier académico* sobre la primera legislatura socialista: «Creo que los aciertos fueron mayores que los errores, y hoy diez años después de que se asistiera a la lógica alternancia democrática, y dos desde que volviera al Gobierno el PSOE, recordamos dicho años con melancolía y con cierta preocupación, por lo que poco que aprendieron de él los jóvenes socialistas». SOTO CARMONA, Álvaro, “Introducción” en id. (ed.), *La primera legislatura socialista en España, 1982-1986. Dossier monográfico, Historia del Presente*, nº 8, (2006), p. 12. En cualquier caso, el mejor ejemplo lo ha constituido la celebración del “Congreso Internacional. Historia de la época Socialista. España: 1982-1996”, celebrado en Madrid, 28 de noviembre - 1 de diciembre de 2011 [www.congresohistoriasocialista.es].

⁶⁷ CASPISTEGUI, Francisco Javier, “Más allá de su oficio, el historiador en sociedad” en PEIRÓ MARTÍN, Ignacio (ed.), *La(s) Responsabilidad(es) del Historiador*. Dossier monográfico, *Alcores. Revista de Historia Contemporánea*, nº 1, (2006), p. 80. Sobre el trabajo del historiador, su ética y sus responsabilidades nos remitimos también al volumen monográfico titulado “Historians and Ethics” y publicado en, *History and Theory*, vol. XLIII, nº 4, (2004).

Tal y como hemos visto con el “caso Petras” y otros estudios sociológicos, las escasas lecturas críticas sobre este tiempo, han sido generalmente omitidas cuando no rechazadas. Todo ello con otras significativas tres consecuencias. Primero, predominio de visiones generalistas que no aguantan el menor examen crítico una vez aplicadas las herramientas de trabajo propias del historiador. Por otro lado, esta situación ha dificultado, en más de una ocasión, la presentación de resultados académicos, al carecer precisamente de un marco propio para tales empresas. Lo que ha terminado por conducir a batallas y conflictos entre diferentes memorias vivas en juego, antes que a un debate sosegado y guiado por las correspondientes reglas. Se hace más que necesario, por tanto, a la hora de historiar este periodo llevar a cabo un “uso público de la historia consciente y crítico, capaz de poner en cuestión la opacidad y la eternidad del pasado para rescatarlo de la tiranía del presente”⁶⁸.

Tal es la situación realmente existente a nivel académico cuando se afronta desde una perspectiva global la *época socialista*, que debería iniciarse su estudio con un interrogante que rara vez se ha llegado siquiera a plantear. Así, y por extraño que pueda resultar, una de las preguntas claves para interpretar de forma correcta las dimensiones históricas de este tiempo, sería la siguiente: ¿Por qué no estalló un conflicto social generalizado durante la “década del cambio socialista”? No se trata de ningún tipo pregunta rebuscada ni retórica. Responde a una realidad histórica concreta, especialmente determinante durante la primera legislatura de los gobiernos socialistas.

Un interrogante, por lo demás, que tiene la virtud de situarnos ante otros tres fenómenos de no pequeño alcance. En primer término, ante los propios mecanismos de dominación y consenso. Una perspectiva gramsciana siempre presente en la propia estrategia de los socialistas españoles, más aún tras conquistar el poder nacional, autonómico y sindical a la altura del otoño de 1983. “[L]a supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como «dominio» y como «dirección intelectual y moral»”, señalaría el pensador italiano⁶⁹. Es decir, se estaría ante lo que Mabel Thwaites, denominaría el esquema de “reproducción consensual de dominación”⁷⁰. Unas tesis que tendrían su correspondiente traslación, por aquellas mismas fechas, a un conocido *Documento de Estrategia* de los socialistas. Tras reconfirmar la validez de su “misión histórica” emprendida y volver a remarcar su “responsabilidad histórica” con España y los españoles –en un discurso cada vez más nacionalista– y en la perspectiva de alcanzar todas

⁶⁸ GALLERANO, Nicola, “Historia y uso público de la historia”, *Pasajes*, nº 24 (2007), p. 97 [“Storia e uso pubblico della storia” en id. (ed.), *L'uso pubblico della storia*, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 17-32].

⁶⁹ GRAMSCI, Antonio, “El problema de la dirección política de la formación y el desarrollo de la nación y del Estado moderno en Italia” en *Antología...*, op.cit., p. 313. Señalaría a continuación: «Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea ya no es ‘dirigente’, sino sólo ‘dominante’, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes creían, etc.». Ibídem. Sobre estas cuestiones hemos hablado largo y tendido en: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Presentación. La «memoria democrática» como conflicto” en id. (coord.), *La memoria como conflicto. Memoria e historia de la Guerra Civil y el Franquismo*. Dossier monográfico, *Entelequia. Revista Interdisciplinar*, nº 7 (2008), pp. 1-53 [www.eumed.net/entelequia]. Véase también al respecto el imprescindible estudio sobre la ‘metamorfosis de la hegemonía’ de, ANDERSON, Perry, *Las antinomias de Antonio Gramsci*, Barcelona, Fontana, 1978 [“The Antinomies of Antonio Gramsci”, *New Left Review*, nº 100, (1976), pp. 5-78].

⁷⁰ THWAITES, Mabel, “La noción gramsciana de hegemonía en el convulsionado fin de siglo. Acerca de las bases materiales del consenso” en FERREYRA, Leandro, LOGIUDICE, Edgardo y id. (eds.), *Gramsci mirando al sur. Sobre la hegemonía en los 90*, Buenos Aires, K&ai Editor, 1994, p. 15. Consúltense también las tesis mantenidas por, POSTONE, Moishe, *Time, labor and social domination. A reinterpretation of Marx's critical theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 [1993] [*Tiempo, trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica de Marx*, Madrid, Marcial Pons, 2006]. Dos últimas aportaciones en castellano al respecto en, SÁNCHEZ SANDOVAL, Augusto, *Sistemas ideológicos y control social*, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2008; y, MANZANOS BILBAO, César, “Génesis de los conflictos, sociedad del miedo e industrialización del control”, *Documentación Social*, nº 161, (2011), pp. 15-42.

las metas de su proyecto de modernizador en el plazo de un cuarto de siglo, reajustarían su propia estrategia de poder a la nueva realidad –todo ello bajo el *eslogan* de una “mayoría para el cambio”– a través del siguiente planteamiento de signo gramsciano:

«[U]na mayoría social de signo progresista articulada establemente al PSOE, completando así la actual hegemonía política con una hegemonía social estable, que garantice la durabilidad de la tarea del cambio y modernización de la sociedad española y la construcción de una democracia avanzada»⁷¹.

No obstante, que la hegemonía política no aseguraba ningún tipo de hegemonía social automática, lo evidenciaría el escenario potencialmente explosivo al que tuvieron que enfrentarse los propios socialistas. De este modo, cuando se recorren estos años, desde una perspectiva social que tiene por centro el mundo de trabajo, se nos visualiza todo un contexto de violencia social y política, generalmente omitida en los grandes relatos. A pesar que se está ante el final del “ciclo de luchas” procedente desde mediados de los setenta, las movilizaciones obreras y sociales marcarían buena parte de la agenda gubernamental. Dos hechos estrechamente vinculados, que nos conducen al tercer elemento que también queríamos reseñar: desde la perspectiva metodológica que se adoptará en la investigación, lo que acaba sobresaliendo serán las incapacidades del propio Gobierno socialista por controlar la situación político-social en no pocas ocasiones, cuando no se verá desbordado por la misma como ocurría en conflictos obreros como los de Sagunto o Euskalduna en 1984 o tiempo más tarde –en concreto en 1987– en Reinos.

A saber, nos enfrentamos a un contexto de crisis generalizada –política, social, económica...–. O dicho con otras palabras, con un marco de inestabilidad generalizado –en el que se debe tener también muy presente el terrorismo de ETA– que llegaría en momentos concretos a cuestionar la propia estabilidad y viabilidad del sistema político-económico en su conjunto. Justamente, los años en los que nos volcaremos con mayor detenimiento –1983 y 1984– constituyen el periodo más complicado de la “época socialista”, e inclusive de parte de la transición postfranquista. Hasta tal punto, que el Gobierno se volcaría plenamente en tratar de frenar las cientos de movilizaciones diarias, de cara a que no desembocarán en el tan temido conflicto social generalizado. No faltaría el recurso a la militarización de servicios públicos, el empleo radical de la violencia de los cuerpos policiales e inclusive a la aparición televisiva del propio Presidente Felipe González, de cara a explicar los inevitables sacrificios que conllevaría el “trance modernizador”. Tampoco faltarían las víctimas mortales en su inmensa mayoría de obreros.

«Marangoni [director de su tesis doctoral] me miró como si fuera un insecto: él tan sólo asignaba investigaciones sobre los menores. Pero qué menores, yo quería ir al grano cuando antes, iba a descifrar, qué digo, a descubrir, a imponer un giro radical en los estudios quién pudiera decirlo [...]. La manía de grandeza nunca me había abandonado, no alberga dudas acerca de mi suerte. Que fue completamente distinta».

Rossana ROSSANDA, *La muchacha del siglo pasado*⁷².

Corresponde a las siguientes páginas poner el principio y el final de una larga tesis doctoral. Desde su puesta en marcha hasta su redacción definitiva han pasado no pocos años. Un

⁷¹ AHFFLC, PSOE-CE, “Documento de estrategia”, Madrid, octubre de 1983, sig. AI-647-08, p. 11.

⁷² ROSSANDA, Rossana, *La muchacha del siglo pasado*, Madrid, Foca, 2008, p. 134 [*La ragazza del secolo scorso*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005].

interesante y agitado tiempo, en que pasamos de querer influir en los ritmos historiográficos y elaborar una gran obra que, en adelante, constituyera una referencia central; a conformarnos con aportar un trabajo serio, bien construido, riguroso y solvente en lo metodológico y humilde en su proyección. Enseñanzas, todas ellas, del director de esta tesis doctoral⁷³. A un ritmo desigual, desde la finalización del trabajo del doctorado hasta el texto que aquí se presenta⁷⁴, se han ido madurando no pocas *ideas-fuerza*, elecciones metodológicas así como no pocos enfoques de cara a abordar tal trabajo con la suficiente solvencia⁷⁵.

A lo largo de este periodo, lo más complicado ha sido distinguir y separar los límites de lo que corresponde al trabajo de un historiador social de carácter interdisciplinar, de lo que correspondería a otras ciencias sociales y económicas. Caminos por los que no faltarían las tentaciones de indagar en más de una ocasión. Tampoco resultaría fácil evitar ciertos paralelismos históricos. Especialmente en la fase final de la redacción, al reaparecer en la escena pública y política no pocos personajes centrales de este relato (Boyer, Ruiz Mateos, Rumasa...). De hecho, habría momentos en que aquella frase de Marx –casi siempre mal trasladada y peor interpretada– mencionada al principio de *El 18 de Brumario de Luis Bonaparte*, cuando hablaba de cómo la historia se repite dos veces, “una vez como tragedia y otra vez como farsa”, alcanzaba visos de cercana realidad⁷⁶.

Pocos son nuestros axiomas de partida. Uno de ellos se encuentra formulado en forma de pregunta y jerarquiza todas y cada una de nuestras prioridades: *cómo y por qué cambian los modos de producción*⁷⁷. A saber, pretendemos internarnos por la contradicción entre las “fuerzas productivas” y las propias “relaciones sociales de producción”⁷⁸. ¿Para qué? Pues para “sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna”, que también señalara el propio Marx⁷⁹. O como lo explicara –más sencillamente– el historiador francés Jean

⁷³ Clave en todo este proceso sería la lectura y relectura de, ARÓSTEGUI, Julio, *La investigación histórica: Teoría y método*, Barcelona, Crítica, 1995.

⁷⁴ El trabajo de tercer ciclo llevaría por título: *La estrategia de la modernización de los gobiernos socialistas (1982-1992). Un análisis histórico del proceso de dualización del mercado de trabajo: la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984*, II vols., Universidad Complutense de Madrid, septiembre 2004 [inédito].

⁷⁵ Un amplio resumen así como un estado de la cuestión sobre esta investigación se presentaría en: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Las vicisitudes del historiador en su sociedad: una propuesta de diálogo” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio, GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, SOUTO KUSTRÍN, Sandra y BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés (coords.), *El valor de la historia: homenaje al profesor Julio Aróstegui*, Madrid, Editorial Complutense, 2009, pp. 331-346.

⁷⁶ En concreto Marx escribiría: «Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra como farsa». Para continuación dejar apuntada otra de sus grandes sentencias: «Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado». MARX, Karl, *El 18 de Brumario de Luis Bonaparte*, Madrid, Fundación Federico Engels, 2003 [1855], p. 10.

⁷⁷ FRANCISCO, Andrés de, “A modo de prólogo: de la centralidad del trabajo a la teoría de la Historia en Marx” en HERRERO VÁZQUEZ, Francisco, *Hacia una reconstrucción del materialismo histórico*, Madrid, Istmo, 2005, p. 14. Consúltense también aquí las siguientes referencias básicas: WOLPE, Harold (ed.), *The articulation of modes of production: essays from Economy and Society*, London / Boston, Routledge & K. Paul, 1980; y, unos años antes, FIORAVANTI, Eduardo, *El concepto de modo de producción*, Barcelona, Península, 1974.

⁷⁸ Esta investigación es deudora, en parte, de la propuesta de ‘marxismo analítico’ planteada por, COHEN, Gerald A., *La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa*, Madrid, Siglo XXI / Fundación Pablo Iglesias, 1986 [*Karl Marx's. Theory of History. A defence*, New Jersey, Princeton University Press, 1978].

⁷⁹ MARX, Karl, “Prólogo a la primera edición” en *El capital...*, *op.cit.*, p. 8.

Chesneaux: “Extraer de cada etapa del pasado la relación específica entre el saber histórico y el modo de producción dominante, tal debería ser la verdadera función de la historiografía (o historia de la historia)”⁸⁰.

En la tarea de *definir y diferenciar* lo importante de lo accesorio, vendría a sumarse una serie de razones. La primera de ellas no dejaba de obedecer a la propia lógica de nuestro oficio. Frente a los abundantes estudios sobre el *cambio social y generacional* –por más que predominarán las visiones acríicas, que, a modo de ejemplo, han tendido a leer la temporalidad juvenil laboral como una especie de “inevitable peaje” a la condición adulta⁸¹– apenas existían estudios de tipo histórico que se hubieran detenido en los significados y consecuencias, que va a acarrear la puesta en marcha del proyecto de modernización socialista a nivel global. Se carecía, por ende, del contexto histórico marco. Asimismo, la observación y el análisis de este marco en sus diferentes ramificaciones aparecía como un escenario dado –cuando no “natural”– de carácter no conflictivo, y referenciado, en no pocas ocasiones, como la aparición de la temporalidad y más tarde de la precariedad laboral. Todo ello sin más antecedentes ni referencias de por medio. Ahora bien, pero hasta llegar a aquella situación, ¿qué etapas se habían recorrido? ¿Cómo podía haber sucedido aquella merma de derechos laborales e inclusive históricos dentro de un Gobierno Socialista? O visto desde otra perspectiva, ¿qué tipo de políticas habían conducido a la práctica liberalización y flexibilización del ordenamiento jurídico-laboral?

Se observara por donde se observara la centralidad de las relaciones capital trabajo –he aquí nuestro segundo axioma– aparecía, pues, como uno de los fundamentales elementos a desentrañar, pero sobre todo a explicar adecuadamente⁸². Así pues, antes de continuar en las siguientes líneas se trazan, de forma breve, algunas cuestiones conceptuales básicas que estructuran y dan sentido a la presente investigación.

Cuando hacemos mención a la “centralidad del mundo del trabajo” así como a la “relación conflictiva entre capital-trabajo”, se está aludiendo a lo siguiente: el hecho de tener o no tener un trabajo asalariado –y en su caso legal o no legal, temporal o no, precario o no– en las sociedades occidentales avanzadas capitalistas, así como las condiciones y los derechos sociales y laborales en que se desarrolla, y claro está los salarios que se perciben por el mismo,

⁸⁰ CHESNEAUX, Jean, *¿Hacemos tabla rasa..., op.cit.*, p. 39.

⁸¹ Nos referimos, por ejemplo, a las tesis que Luis Garrido ha mantenido en diferentes trabajos: GARRIDO, Luis, “La temporalidad ¿pacto intergeneracional o imposición?” en CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ed.), *La duración del contrato de trabajo*, Madrid, Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, 1996, pp. 47-91; y, id. y GONZÁLEZ, Juan Jesús, “Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales” en GONZÁLEZ, Juan Jesús y REQUENA, Miguel (eds.), *Tres décadas de cambio social en España*, Madrid, Alianza, 2005, pp. 81-125. En este sentido, véase también el interesante como aclaratorio trabajo de, GASH, Vanessa, “Bridge or Trap? Temporary Workers’ Transitions to Unemployment to the Standard Employment Contract”, *European Sociological Review*, vol. XXIV, nº 5, (2008), pp. 651-658.

⁸² Nos remitimos aquí a, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Las relaciones capital-trabajo en España” en id. (ed.), *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social*. Dossier monográfico *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, nº 29 (2007), pp. 105-113; y, id. “Presentación. Viejos y nuevas preguntas en torno a las relaciones capital-trabajo” en id. (coord.), *La clase trabajadora, después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 26/27 (2008), , pp. 7-28. A nivel teórico nos remitimos al aclaratorio trabajo de, ANTUNES, Ricardo, “La centralidad del trabajo hoy”, *Herramienta. Debate y crítica marxista*, nº 8, (1998). De interés resultan también las tesis mantenidas por el actual director de la OIT, SOMAVIA, Juan, “La centralidad del trabajo en un mundo en crisis” en RUESGA BENITO, Miguel y RESA NESTARES, Carlos (eds.) y FERRER SAIS, Antonio (coord.), *Anuario de relaciones laborales en España*, Madrid, Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 2010, vol. 1, pp. 45-46. Dentro de ese mismo volumen consúltase también el texto de, PRIETO, Carlos, “La centralidad social del trabajo y del empleo: un debate más político que técnico” (pp. 125-127).

constituye la principal fuente de subsistencia humana y de determinación de la posición de clase del trabajador, pero a su vez de generación de una identidad social colectiva y personal⁸³.

Más allá de las nuevas lecturas sobre la degradación sustancial de la condición del trabajo⁸⁴ –o dicho con las palabras de Luis Enrique Alonso, “[l]a quiebra institucional del trabajo”⁸⁵– y de las tesis cada vez más predominantes sobre la pérdida de esta misma centralidad⁸⁶ –que a su vez tienen la suficiente capacidad de desvincular los procesos históricos de su relación (conflictiva) con los modelos de producción dominantes en cada momento– precisamente, la defensa del axioma de la “centralidad del mundo trabajo” y de sus naturales como inevitables relaciones conflictivas entre capital y trabajo, nos aboca a uno de los principales como determinantes factores explicativos del acontecer histórico en las sociedades industriales como postindustriales. En otro tiempo y en otras circunstancias lo anterior resultaría innecesario. En el contexto en donde se inserta esta investigación histórica, por más que resulte

⁸³ Junto con el trabajo ya citado de, FRANCISCO, Andrés de, “A modo de prólogo: de la centralidad del trabajo a la teoría de la Historia en Marx” en HERRERO VÁZQUEZ, Francisco, *Hacia una reconstrucción...*, op.cit., y la propia definición al respecto de ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, op.cit., citada en la nota 33, véanse la revisión de las tesis marxistas de, LEBOWITZ, Michael A., *Más allá de “El Capital”: la economía política de la clase obrera en Marx*, Madrid, Akal, 2005 [*Beyond capital: Marx's political economy of the working class*, London / New York, Pacgrave Macmillan, 1996]. Desde una visión a largo plazo, MOULIER-BOUTANG, Yann, *De la esclavitud al trabajo asalariado. Economía histórica del trabajo asalariado embridado*, Madrid, Akal, 2006 [*De l'esclavage au salariat: Economie historique du salariat bride*, Paris, Presses Universitaires de France, 1998]. En francés también, AUTAIN, Clémenten, *Le Retour du peuple: de la classe ouvrière au précarat*, Paris, Stock, 2012. Desde una perspectiva filosófica: RODRÍGUEZ GUERRA, Jorge, *La transformación de la sociedad salarial y la centralidad del trabajo*, Madrid, Talasa, 2006. Por último, IÑIGO CARRERA, Nicolás, “El concepto de clase obrera y la resistencia a la precariedad” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la...*, op.cit., pp. 443-448.

⁸⁴ Además de lo apuntado a lo largo de esta *Presentación* y en el apartado “2.2.4. El mundo del trabajo y las relaciones laborales: un balance generalista”, ténganse presentes las lecturas de las siguientes referencias básicas: NOGUERA, José Antonio, “El concepto de trabajo y la teoría social crítica”, *Papers*, n° 68, (2002), pp. 141-168; GARZA, Enrique de la, “Problemas clásicos y actuales de la crisis del trabajo” en id. y NEFFA, Julio (comps.), *El futuro del trabajo, el trabajo del futuro*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002, pp. 11-31.

⁸⁵ «La quiebra del estatuto institucional del trabajo en las sociedades occidentales se ha visto reflejada tanto en la pérdida de garantías jurídicas laborales y derechos de ciudadanía, como en el dislocamiento y fragmentación de los ciclos de trayectorias laborales, impulsadas éstas ahora por una azarosa búsqueda de acomodo en el mundo del trabajo, que se presenta por definición en forma de ‘un puesto de trabajo’ inestable, sin horizonte futuro, volátil y despegado de cualquier compromiso social que no sea el de la más estricta rentabilidad privada para el contratante». ALONSO, Luis Enrique, *Trabajo y ciudadanía...*, op.cit., p. 62.

⁸⁶ La obra más conocida a la par que más fuertemente criticada sería la de Jeremy Rifkin, *El fin del trabajo*. En plena ‘oleada neoliberal’ de los años noventa, aquella se encuadraría dentro de la tríada ideológica del fin de las ideologías, el fin de la historia así como el fin del trabajo: RIFKIN, Jeremy, *El fin del trabajo: el declive de la fuerza del trabajo global y el nacimiento de la era posmoderna*, Barcelona, Paidós, 1996 [*The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*, New York, Penguin Group, 1995]. Lecturas críticas al respecto en, BOUFFARTIGUE, Paul, “¿Fin del trabajo o crisis del trabajo asalariado?” en *Trabajo y proceso del trabajo*. Dossier monográfico, *Sociología del Trabajo*, n° 29, (1996-1997), pp. 91-110; GARZA, Enrique de la, “¿Fin del Trabajo o Trabajo sin Fin?” en CASTILLO, Juan José (ed.), *El trabajo del futuro*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1999, pp. 13-40; ALONSO, Luis Enrique, “¿El fin del trabajo o el trabajo sin fin?: Una revisión crítica de las tesis de Jeremy Rifkin”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, n° 6, (1998), pp. 13-34. Finalmente, otras lecturas que han incidido en esta pérdida de la centralidad del mundo del trabajo, aunque bajo otras ‘tesis más suaves’, en, TOURAINE, Alain, “De la antigua a la nueva sociología del trabajo” en *Antigua y nueva sociología del trabajo*. Dossier monográfico, *Sociología del Trabajo*, n° 35, (1998-1999), pp. 3-24.

obvio, se hace sino inevitable al menos aconsejable tal explicación ante el creciente distanciamiento académico con respecto al propio “mundo del trabajo”.

A partir de esta defensa de la centralidad de las relaciones capital-trabajo como el vehículo a partir del cual, y con el que, construir un discurso y una práctica historiográfica razonada sobre el “mundo del trabajo”; su traslación a nuestro estudio de caso se concreta, fundamentalmente, en el estudio de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 –y sus posterior desarrollo legislativo– y de forma específica en el análisis de sus resultados y consecuencias de todo orden. Todavía más, pues, el *nexo* de unión entre el *Informe Petras* y nuestra investigación lo constituye lo que en más de una ocasión hemos definido como la formación histórica de la “cultura de la precariedad”⁸⁷.

La potencialidad explicativa de este término en perspectiva de lo histórico es innegable. En el preciso momento en que se superan las definiciones parciales que se han acometido por el derecho del trabajo, la sociología, la economía... nos encontramos con una categoría histórica lo suficientemente consistente para ser empleada como tal. Pero antes de ofrecer una posible definición de lo que entendemos y se puede entender por *cultura de la precariedad*, primero, nos hemos de detenernos en el concepto de “precariado”.

Como recordó en su momento Noam Chomsky le debemos el origen de este concepto a los activistas laborales italianos a principios del siglo XXI. Un término –el “precariato”– con el que se referirse a la “cada vez más precaria existencia de la gente trabajadora «en los márgenes»”⁸⁸. Como parte ya de una realidad histórica viva, la aparición y consolidación del sujeto del precariado ha venido a transmutar el sentido del trabajo y/o el empleo⁸⁹. Aquello que Gramsci definiría como la “moral de la fábrica”⁹⁰. Pero también el nacimiento del precariado ha venido a interrumpir y a transformar los modelos biográficos laborales/vitales, así como los mecanismos de socialización y de identidad social colectiva, típicos de las sociedades fordistas de la segunda mitad del siglo XX hasta avanzada la década de los ochenta.

⁸⁷ GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La generación de la «cultura de la precariedad»: una aproximación desde la historia del movimiento obrero” en id. (ed.), *Cultura de la..., op.cit.*, pp. 336-366; id., “Rupturas, continuidades y tendencias en la Historia del Movimiento Obrero: la formación histórica de la «generación de la cultura de la precariedad»”, *XIX y Veinte. Revista de Historia y Pensamiento Contemporáneo*, nº 1, (2007), pp. 11-54; id., “El Movimiento Obrero en la España del tiempo vivido: del sujeto político al nuevo «precariado»” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y id. (coord.), *Manuel Tuñón de Lara, diez años después. La huella de un legado*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 30 (2008), pp. 199-226.

⁸⁸ CHOMSKY, Noam, “El ataque contra la fuerza obrera”, *Rebelión*, 10 de mayo de 2011. Recordaba allí lo siguiente el lingüista norteamericano: «Luego se extendió para aplicarse al creciente ‘precariado’ en el núcleo de la fuerza laboral, el ‘proletariado precario’ que padecía los programas de desindicalización, flexibilización y desregulación que son parte del ataque contra la fuerza laboral en todo el mundo». Por lo demás, terminaba indicando como en EEUU desde 1958 el 1º de Mayo ya no era el «Día de los Trabajadores» sino que se había cambiado por el «Día de la Lealtad». Consúltense también aquí los trabajos de, TIDDI, Andrea, *Precari. Percorsidi vita tra lavoro e non lavoro*, Roma, Derive Aprrodi, 2002.

⁸⁹ De interés resulta acercarse a las tesis mantenidas por, LARA RODRÍGUEZ, Ángel Luis, “Una aproximación al ecosistema de la nueva fuerza de trabajo”, *Cuaderno de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XXI, nº 2, (2003), pp. 215-230. Y asimismo, KOVÁCS, Ilona y CONCEIÇÃO CERDEIRA, Maria da, “Calidad del empleo, ¿quiebra generacional «versus» quiebra societal?”, *Sociología del Trabajo*, nº 66, (2009), pp. 73-106.

⁹⁰ GRAMSCI, Antonio, “A los comisarios de la sección de los talleres de Fiat-Centro y Talleres” en *Antología..., op.cit.*, p. 65 [1919]. Consúltense también aquí el clásico trabajo de, ANTHONY, Peter D., *The Ideology of Work*, London, Routledge, 2001 [1977].

Todo un fenómeno histórico que ha llevado a algunos autores hablar de la nueva “proletarización” de la clase obrera⁹¹, de la formación de un “nuevo subproletariado”⁹² y en otros casos de la aparición de un nuevo “cuarto mundo”⁹³. Inclusive autores como Guy Standing han insistido, recientemente, en que el precariado no forma parte de la *clase obrera* ni del *proletariado clásico*. Para este mismo autor sería una nueva “clase social” en permanente crecimiento y con unos rasgos comunes diferenciadores, y cuya propia situación laboral y perspectivas vitales le convertirían en una potencial “dangerous class”⁹⁴.

Desde una perspectiva histórica “de clase” –poco usual dentro de este campo– el precariado como el sujeto central de la nueva fuerza de trabajo en las sociedades postindustriales, ha de encuadrarse como una (sub)categoría dentro de la clase asalariada, o, si se prefiere, la clase trabajadora. En ningún caso, se puede hablar de una nueva “clase social”. Sus componentes tengan conciencia *para sí* o no de su situación, juegan un rol determinante dentro de la *new economy*⁹⁵. Constituidos en los eslabones más débiles del conjunto del modelo de producción –tanto a nivel jurídico como en el campo de las propias realidades laborales dentro y fuera de los centros de trabajo– son la expresión de la degradación de los derechos sociales y laborales conquistados durante los decenios anteriores por parte del movimiento obrero clásico.

Asimismo, el hecho de ser y/o autoconsiderarse un precario no sólo se debe vincular en exclusiva a una relación laboral o la normalización de la situación de permanente salidas-entradas del mercado de trabajo. Aunque su origen se ha de situar –principal aunque no únicamente– en la modificaciones flexibilizadoras del ordenamiento jurídico-laboral y a su vez en la instalación del llamado “modelo de producción flexible”, su posterior configuración como una nueva *subcategoría asalariada* les confiere una entidad grupal propia, que va mucho su posición dentro de marco establecido de relaciones laborales.

Una entidad grupal –más allá, de nuevo, de si se reconocen o no como un posible “nosotros” colectivo– que se vincula entre sí a través de una serie de características y elementos *objetivos* y *subjetivos* afines. Primero, por su propia vulnerabilidad económica, laboral y social, al haberse convertido la precariedad laboral en un fenómeno estructural, que ya no sólo vinculada a situaciones de entrada en el mercado de trabajo, al haberse extendido tal situación como un posible escenario que puede llegar a afectar toda la biografía laboral del asalariado. Una vulnerabilidad asociada a los riesgos implícitos de estar bordeando o caer en procesos de exclusión social⁹⁶. Segundo, consolidado el proceso histórico de dualización/segmentación del

⁹¹ LACALLE, Daniel, *La clase obrera...*, *op.cit.*; y también id., *Trabajadores precarios. Trabajadores sin derechos. Los trabajadores españoles a comienzos del siglo XXI*, [Barcelona], Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo, 2009. Desde una similar óptica, DÍAZ-SALAZAR, Rafael, “Trabajadores precarios: el proletario del siglo XX” en id. (ed.), *Trabajadores precarios...*, *op.cit.*, pp. 67-108.

⁹² DAHRENDORF, Ralf, “El nuevo subproletariado” en DÍAZ-SALAZAR, Rafael (ed.), *Trabajadores precarios...*, *op.cit.*, pp. 127-135. Incluso se ha llegado a hablar de ‘infoproletario’: ANTUNES, Ricardo, “La nueva morfología del trabajo y sus principales tendencias: informalidad, infoproletario, (in)materialidad y valor”, *Sociología del Trabajo*, nº 74, (2012), pp. 47-68.

⁹³ CASTEL, Robert, *Las metamorfosis de...*, *op.cit.*.

⁹⁴ STANDING, Guy, *The New Dangerous Class*, London / New York, Bloomsbury Academic, 2011.

⁹⁵ Al respecto un estudio comparativo altamente relevador de lo dicho aquí en, LAGALA, Canio (ed.), [DISPERSYN, Michel, FUCHS, Maximilian, GORELLI HERNÁNDEZ, Juan, KING, Sarah-Jane, LABORDE, Jean-Pierre], *Precariato e welfare in Europa: la tutela dei lavoratori precari in Belgio, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna*, Roma, Ediesse, 2007.

⁹⁶ Nos remitimos aquí a la amplia bibliografía apuntada en el apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinarias”. No obstante,

mercado de trabajo, esta nueva subcategoría encuadrada –en términos generales– dentro de los *outsiders*, estaría marcada por la inseguridad, la temporalidad y los bajos salarios. De hecho, las frecuentes entradas y salidas del mercado de trabajo –nos referimos a la conocida “regla *lifo*” (*last in, first out*)– diluirán progresivamente las fronteras materiales e inmateriales entre la condición del desempleado y el propio precariado, ampliándose, por esta misma vía, el potencial “ejército de reserva” del capital. En tercer lugar, dentro de este ‘precariado’ conviven sujetos con diversos niveles de educación y cualificación, y no necesariamente su procedencia de origen se vincula, exclusivamente, con los estratos obreros bajos y bajos-medios –aunque claramente mayoritaria– sino que inclusive pueden proceder de la “clase media” baja. En cuarto término, se ha destacar que precariado debe conjugarse mayoritariamente en femenino. En quinto lugar, los sujetos que conforman el precariado presentan ya no sólo bajas tasas de afiliación sindical, sino que a partir de su aparición y consolidación como nuevo sujeto histórico, terminarían por finiquitar la cohesión interna y las redes de solidaridad, que habían definido y sostenido la fortaleza del movimiento obrero⁹⁷. En último lugar, el precariado estaría determinado, además de lo dicho, por las dificultades de salir de esta situación –no sólo laboral– a la par que configurar una biografía personal, en donde las posibilidades de una movilidad social ascendente –o cuando menos igualitarista– y de construcción de un itinerario vital con ciertas garantías de estabilidad a medio-plazo, se habían visto truncadas⁹⁸. Una indefinición vital-laboral que deja, en quienes viven o han vivido en dicha situación, una importante huella psicológica. Nos referimos al denominado “efecto cicatriz” –o como lo denominara Richard Sennett se habría producido una *corrosión del carácter*⁹⁹– que nos habla, precisamente, de los costes no materiales –y rara vez reseñados– del hecho de ser –o haber sido– precario. Un *efecto cicatriz* que se proyecta en el terreno de las frustraciones personales en forma de desequilibrios psicológicos y mentales, y que, al mismo tiempo, han de asociarse con toda una serie de enfermedades –por ejemplo, el incremento de la depresión y otros trastornos¹⁰⁰– así como otros

véase aquí, MORA ROSADO, Sebastián, “La dinámica histórica de la exclusión social”, *Documentación Social*, nº 149-150, (2008), pp. 129-158.

⁹⁷ Al respecto nos remitimos al documentado texto de, CILLEROS CONDE, Roberto, “Las consecuencias de las nuevas características del trabajo en la afiliación sindical”, *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, nº 1, (2011), pp. 28-50. E igualmente, SIMÓN PÉREZ, Hipólito J., “¿Qué determina la afiliación a los sindicatos en España?”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 41, (2003), pp. 68-88; FERNÁNDEZ MACÍAS, Enrique, “Job instability and political attitudes towards work: some lessons from the Spanish case”, *European Journal of Industrial Relations*, vol. XIX, nº 2, (2003) pp. 205-222; MARTÍN ARTILES, Antonio, JÓDAR, Pere y ALÓS-MONER, Ramón de, “El sindicato hacia dentro: la relación entre la organización y los trabajadores desde el análisis de la afiliación” en *Visions alternatives sobre la societat i la realitat social*. Dossier monográfico, *Papers*, nº 72, (2004), pp. 113-144.

⁹⁸ Además del trabajo ya citado de, ECHEVERRÍA, Javier, *La movilidad social...*, *op.cit.*, MARQUÉS PERALES, Ildefonso y HERRERA-USAGRE, Manuel, “¿Somos más móviles? Nuevas evidencias sobre la movilidad intergeneracional de clase en España en la segunda mitad del siglo XX?”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 131, (2010), pp. 43-73. Sobre las *expectativas y perspectivas* véase, más allá de lo que se señalará en siguientes capítulos, el trabajo de, CASTRO PERICACHO, Carlos de, “La influencia de las expectativas en la organización temporal de la vida” en *Las nuevas formas familiares del siglo XXI*. Dossier monográfico, *Política y sociedad*, vol. XXXLIV, nº 2, (2008), pp. 169-188.

⁹⁹ SENNETT, Richard, *La corrosión del...*, *op.cit.*

¹⁰⁰ Junto con parte de los trabajos ya citados y los que se citarán en el Capítulo 2 en la *nota 147* y *nota 148*, consúltese, en primer lugar, el volumen colectivo dirigido por, AGULLÓ TOMÁS, Esteban y OVEJERO BERNAL, Anastasio (coords.), *Trabajo, individuo y sociedad: perspectivas psicológicas sobre el futuro del trabajo*, Madrid, Pirámide, 2001, y dentro del mismo, AGULLÓ TOMÁS, Esteban, “Entre la precariedad laboral y la exclusión social: los otros trabajos, los otros trabajadores” (pp. 95-144). Por lo demás, JIN, Robert, SHAH, Chandrakant P. y SVOBODA, Tomislav J., “The Impact of Unemployment on Health: A Review of the Evidence”, *Journal of Public Health Policy*, vol. XVIII, nº 3, (1997), pp. 275-301; BENACH, Joan, BENAVIDES, Fernando G., PLATT, Steve, DIEZ-ROUX, Ana y MUNTANER, Carles, “The Health-Damaging Potential of New Types of Flexible Employment: A

riesgos notables para la salud –por ejemplo, el incremento del suicidio juvenil¹⁰¹– y que, igualmente, se vinculan con determinadas actitudes políticas, sociales y grupales¹⁰². Pero no sólo, pues como han demostrado no pocos estudios existe una probada relación entre temporalidad/precariedad y la siniestralidad laboral¹⁰³.

Justamente en esta investigación se examinarán los orígenes de la “formación histórica del precariado” como un nuevo sujeto histórico del presente vivido¹⁰⁴. No sólo, pues, nos situaremos en el surgimiento de lo que llamaremos la primera “generación de la precariedad”, al calor, justamente, de las consecuencias de todo tipo que va a acarrear la puesta en marcha de la RET⁸⁴. Nos referimos a los “orígenes”, primero, ya que se trata de un proceso histórico que se intensificará progresivamente más allá de las fronteras cronológicas de esta investigación; y, en segundo lugar, desde una perspectiva temporal a medio plazo ya cabría incluso a hablar de la primera y segunda “generación de la precariedad” –ello a través de un proceso de

challenge for Public Health Researchers”, *American Journal of Public Health*, vol. XC, nº 8, (2000), pp. 1316-1317; AMABLE, Marcelino, BENACH, Joan y GONZÁLEZ, S., “La precariedad laboral y su repercusión sobre la salud; conceptos y resultados preliminares de un estudio multimétodos”, *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, vol. IV, nº 4, (2001), pp. 169-184; y más recientemente, RUBIO ARRIBAS, Javier, “Aspectos sociológicos del desempleo/paro y de la precariedad laboral”, *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, nº 9, (2004). Asimismo véase el estudio piloto firmado por IKASSON, Kerstin, “Employment contracts and psychological contracts in Europe. Results from a pilot study”, *Saltsa Report*, nº 1, (2003).

¹⁰¹ En primer lugar, nos remitimos a la tesis doctoral de, PINTO RODRÍGUEZ, M^a Elena, *Suicidio juvenil. Sociología de una nueva realidad social*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006. También, ALVIRA MARTÍN, Francisco R. y CANTERAS MURILLO, Andrés, *El suicidio juvenil*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1997. Y, por último, al documentado trabajo de, PÉREZ CAMARERO, Santiago, “El suicidio adolescente y juvenil en España” en *La salud mental de las personas jóvenes en España*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 84, (2009), pp. 126-142.

¹⁰² Se toma aquí prestado el concepto ‘efecto cicatriz’ del trabajo de, id., CALDERÓN, M^a José, HIDALGO VERA, Alvaro y IVANOVA, Alexandra, “Efectos de la crisis económica sobre la juventud”, *Documento de Trabajo del Instituto Max Weber*, noviembre 2010 [www.imv.es]. Por lo demás, en el *resumen ejecutivo* de un proyecto titulado, “¿Atrapados o flexibles?” –financiado por la Comisión Europea– y centrado en jóvenes de niveles educativos medios-altos a partir de un estudio comparativo europeo, se señalaba al respecto: «Los efectos de la precariedad en el empleo podrían ser especialmente negativos y persistentes para los trabajadores jóvenes, puesto que las primeras experiencias problemáticas de transición hacia el trabajo están asociadas, probablemente, a una reducción general de las oportunidades en la vida a largo plazo (el llamado ‘efecto cicatriz’).» Añadiendo a continuación: «La difusión cada vez mayor de puestos de trabajo precarios entre los jóvenes, incluidos los de alto nivel educativo, representa también un coste social, ya que la pérdida de recursos humanos jóvenes altamente cualificados reduce las perspectivas de crecimiento, mientras que amplía los riesgos de pobreza y la desigualdad de ingresos dentro y entre generaciones, con elevados costes presupuestarios relacionados con los menores ingresos fiscales y el aumento del gasto social». ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE, DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA UNIDAD DE TRENTO, AMITIÉ, INSTUTE FOR EMPLOYMENT STUDIES Y CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS TOMILLO, *¿Atrapados o flexibles? Transiciones de riesgo y políticas a desarrollar para las y los jóvenes trabajadores altamente cualificados en Europa. Resumen Ejecutivo*, [s/l], Comisión Europea, febrero 2012 [www.injuve.es]. Véase asimismo la web del citado proyecto, “Skilled and Precarious. Trapped or Flexible? Risk transitions and missing policies for young high-skilled workers in Europe” [www.skilledandprecarious.eu]. En este sentido, también puede resultar útil acercarse al trabajo clave de, SCHMID, Günter, *Full Employment in Europe: Managing Labour Market Transitions and Risks*, Cheltenham, Edward Elgar, 2008. Sobre la relación entre precariado y comportamiento ciudadano, ALTERI, Luca y RAFFINI, Luca, “Trabajadores precario, ¿ciudadanos precarios?”, *Sistema*, nº 197-198, (2007), pp. 43-58.

¹⁰³ Consúltase aquí el Capítulo “8. El precio de la modernización. «Principios de realidad» esenciales: los resultados macroeconómicos”.

¹⁰⁴ Véase *nota 87*.

sucesión/renovación generacional dentro un mismo modelo de reproducción y socialización social– dependiendo de las cohortes –por un lado, la llamada *generación* del “baby boom” (1965-1980) y, por otro, la siguiente cohorte ya mucho menos numerosa (1980-1995)– a la que nos referimos¹⁰⁵.

Como también se ha adelantado, durante la época socialista se asistirá al nacimiento, extensión y consolidación de la “cultura de la precariedad” como una de las más definidas y significativas expresiones de cambio social en este tiempo. Definido –o al menos caracterizado– el precariado, cuando nos referimos a la *cultura de la precariedad*, en primer lugar, tenemos que tener presente que nos enfrentamos a un fenómeno histórico de carácter interclasista y transversal, en tanto afecta globalmente –aunque no de forma igual– a la práctica totalidad de las categorías y estratos de la clase asalariada –a excepción solamente de los funcionarios y otros sectores privilegiados– así como a los diferentes niveles educativos y a todos y a cada uno de los grupos de edad.

Su definitiva instalación dentro de un imaginario social compartido, ha terminado afectando tanto a los propios precarios como a quienes, por el momento, se pueden encuadrar dentro de los *insiders*. Bien sea a través del aprendizaje y/o de la vivencia directa de la precariedad, o bien mediante la socialización indirecta y/o externa en los propios valores de la propia “cultura de la precariedad”, se ha llegado a formar parte de la misma –consciente o inconscientemente– así como de sus propias inercias.

De esta forma, si partimos de la definición de “cultura” que proporciona la Real Academia Española, y que señala en su tercera voz, “[c]onjunto de modos de vidas y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social”; se puede entender mejor las propias dimensiones históricas que ha alcanzado el propio proceso de naturalización e interiorización de la “cultura de la precariedad”, durante los treinta últimos años. Hasta tal punto que al ser parte de esta misma cultura, la percepción de los riesgos y/o de los miedos de entrar en el “círculo vicioso” de la precariedad laboral, se haya convertido en una de las principales realidades a la par que amenazas para la mayor parte de la clase asalariada¹⁰⁶. Es decir, dicho *paradigma cultural* tendría dos proyecciones temporales: la presente y la futurible. Ello, además, bajo el síndrome de que su exponencial crecimiento y su tendencia homogeneizadora descendente en materia de derechos, conlleva, a su vez, un efecto disciplinador del conjunto de la clase asalariada dentro y fuera de los centros de trabajo¹⁰⁷.

Dos últimos “rasgos” han de destacarse. El primero es que la propia “cultura de la precariedad” va a chocar frontalmente con la “clásica” *cultura del trabajo* de las sociedades industriales¹⁰⁸. En segundo lugar, referirnos a esta misma cultura conlleva remitirnos a su vez a

¹⁰⁵ A nivel teórico volveremos sobre esta trascendental cuestión en el apartado “2.2.7. La cuestión generacional: debatiendo las tesis consensualistas”; y a un nivel teórico-empírico en el Capítulo “3. A vueltas con la historia social: debates, controversias y dilemas del historiador social hoy en sociedad en España”, y más concretamente en el Epígrafe IV, “Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”.

¹⁰⁶ Véase al respecto, LÓPEZ CALLE, Pablo, *La desmovilización general. Jóvenes, sindicatos y reorganización productiva*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007, p. 13.

¹⁰⁷ Consúltense las tesis manejadas al respecto por, REVILLA, Juan Carlos y TOVAR, Francisco José, “El control organizacional en el siglo XXI: en busca del trabajador autodisciplinado”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 135, (2011), pp. 47-68. Y de forma específica, ALONSO, Luis Enrique y FERNÁNDEZ Rodríguez, Carlos J., “Uso del trabajo y formas de gobernabilidad: la precariedad como herramienta disciplinaria” en CRESPO, Eduardo, PRIETO, Carlos y SERRANO, Amparo (coords.), *Trabajo, subjetividad y ciudadanía: paradojas del empleo en una sociedad en transformación*, Madrid, Editorial Complutense / Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009, pp. 229-258.

¹⁰⁸ Clarificador en esta línea, CALLEJO GALLEGOS, Manuel Javier, “Las transformaciones del sentido del trabajo: un análisis comparativo entre generaciones” en CRESPO, Eduardo, PRIETO, Carlos y SERRANO, Amparo (coords.), *Trabajo, subjetividad y...*, op.cit., pp. 175-206.

las consecuencias últimas de todo un proceso histórico, que interpretado tanto en términos políticos, socioeconómicos como estrictamente culturales, se encuentran vinculado a los resultados –queridos o no queridos, esa es otra cuestión– de la transformación de los mecanismos de explotación capitalista, que acompañaría a la *salida liberal* de la crisis del modelo de acumulación desde mediados de los setenta¹⁰⁹.

A partir de las definiciones propuestas, historiar los procesos y fenómenos históricos a los que se vinculan dichas conceptualizaciones nos puede aportar no pocas claves interpretativas. La más importante –a la par que más obvia– es que el nacimiento del sujeto histórico del precariado y de la propia “cultura de la precariedad”, no deja de ser una de las más palpables muestras de una nueva correlación de fuerzas entre capital-trabajo. A su vez, observado tal fenómeno, desde una perspectiva a medio y largo plazo, nos muestra dos caras. Si bien, es indudable que nos enfrentamos ante un fenómeno histórico nuevo, también es cierto que la precariedad –denominada o no así– ha estado más que presente en la larga historia del capitalismo. Como ha estado presente el desempleo, los bajos salarios, la segmentación, la dualización y, cómo no, la explotación del trabajo. No han faltado para referirse a este cambio tan trascendental expresiones como las proporcionadas por Luc Boltansky y Ève Chiapello cuando hablarán de *El nuevo espíritu del capitalismo*¹¹⁰, o el propio Richard Sennett cuando se refiriera a *La nueva cultura del capitalismo*¹¹¹. ¿Realmente puede así calificarse? Creemos que no, si pretendemos categorizarlo como un todo absoluto. En verdad, lo que Marx explicaría tanto en *El Capital* como en los *Grundrisse*, sigue conservando una extraordinaria vigencia, a la hora de entender el mecanismo central que todo lo mueve:

«La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. La condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de obreros entre sí»¹¹².

Sin embargo, lo que nunca había sucedido –he aquí la gran novedad en términos históricos– es que en las sociedades contemporáneas industriales se iniciará y se consolidará todo un proceso de recorte y anulación de derechos políticos, sociales y laborales conquistados. No sin razón, en más de una ocasión, se ha hablado de la vuelta al siglo XIX¹¹³.

¹⁰⁹ De cara a interpretar, a nivel teórico, nos remitimos a las tesis expuestas en su día por, ROEMER, John E., *A general theory of exploitation and class*, Cambridge, Harvard University Press, 1982 [*Teoría general de la explotación y de las clases*, Madrid, Siglo XXI, 1989]. El autor elaborará su marco explicativo, a partir de la combinación de la ‘elección racional’ y la ‘teoría de los juegos’.

¹¹⁰ BOLTANSKI, Luc y CHIAPELLO, Ève, *El nuevo espíritu del capitalismo*, Madrid, Akal, 2002 [*Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris, Gallimard, 1999].

¹¹¹ SENNETT, Richard, *La cultura del nuevo capitalismo*, Barcelona, Anagrama, 2006 [*The culture of the new capitalism*, New Haven / London, Yale University Press, 2006].

¹¹² MARX, Karl, *Elementos fundamentales para...*, op.cit., p. XVI. En el propio *Prólogo a El Capital* dejaría asentado su objetivo de la siguiente forma: «Lo que he de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondiente». MARX, Karl, “Prólogo a la primera edición” en *El capital...*, op.cit., p. 6 [cursiva en el texto original]. Véase sobre la vigencia y consistencia de los planteamientos marxistas, LEADBEATER, David, “The consistency of Marx’s categories of productive and unproductive labour”, *History of Political Economy*, vol. XVII, nº 4, (1985), pp. 591-618; y de forma específica en, NEGRI, Antonio, *Marx más allá de Marx: cuaderno de trabajo sobre los “Grundrisse”*, Madrid, Akal, 2001 [*Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse (I fatti e le idee. Saggi e biografie)*, Milano, Feltrinelli, 1979].

¹¹³ Dos visiones globales sobre los efectos desbastadores de esta última etapa del capitalismo en: HARVEY, David, *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal, 2007 [*A brief history of neoliberalism*, Oxford, Oxford University Press, 2005]; y de este último autor también, id., *The enigma of capital and the crises of capitalism*, London, Profile Books, 2010 [*El enigma del capital y las crisis del capitalismo*, Madrid, Akal, 2012]; y, especialmente, FONTANA, Josep, *Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945*, Barcelona, Pasado & Presente, 2011.

Así pues, las implicaciones de interpretar la “cultura de la precariedad” como cambio social histórico son innumerables desde la perspectiva aquí adoptada. Nos permite no sólo una explicación macrohistórica, sino configurar toda una suerte red de redes bajo el binomio de causas-efectos. Aquí tan sólo nos detendremos en sus aristas básicas. Primero, examinaremos dicho proceso histórico desde su nacimiento, para detenernos en su consolidación así como en su posterior naturalización e interiorización a nivel social como un nuevo conjunto de significados y valores otorgados al trabajo/empleo —un *nuevo habitus* en palabras de Pierre Bourdieu¹¹⁴—. Un ángulo de observación elemental para comprender el paso del *hecho social-laboral* al *hecho histórico*. La vuelta a salarios mínimos para cada vez un más amplio espectro de la clase asalariada —lo que Marx llamaría la *depauperización relativa*¹¹⁵— junto con lo que el propio Petras denominaría el incremento de la “vulnerabilidad social”, serán dos de sus consecuencias más sobresalientes¹¹⁶. También la consolidación de la precariedad como hecho social e histórico, tendrá un efecto disciplinador, por más que no llegue a ocultar de forma plena y social amplios posos de “frustración social” y de “desesperación oculta”¹¹⁷. Como también se ha dejado apuntado, la “cultura de la precariedad” ha terminado legitimando el orden social y desactivando potencialmente el conflicto. Igualmente, frente a este debilitamiento del hecho sindical-político —en gran medida dado por las propias actitudes defensivas *insiders* de los sindicatos mayoritarios del país durante la década de los ochenta¹¹⁸— el poder empresarial reforzaría a ultranza el principio de la *defensa de la producción*, hasta modificar radicalmente sus estrategias frente al conflicto dentro del centro de trabajo¹¹⁹. Así pues, por ese mismo camino se verían confirmadas las tesis de Michael Burawoy cuando hablaba del *consentimiento en la producción*¹²⁰.

¹¹⁴ BOURDIEU, Pierre, *La Distinction: Critique sociale du jugement*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979 [*La distinción: criterios y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus, 1988].

¹¹⁵ Véase al respecto la interpretación proporcionada por, GUERRERO, Diego, *Un resumen completo de ‘El capital’ de Marx*, Madrid, Maia, 2008, p. 20.

¹¹⁶ «Entre los trabajadores jóvenes hay una frustración creciente por el empleo inestable, el trabajo ocasional de subsistencia y la incapacidad [...]. Los jóvenes trabajadores temporales de hoy no tienen seguridad en el empleo, y apenas organizaciones colectivas o apoyo: están atomizados y son vulnerables a los dictados del empresario, que tiene el sostén legal del Estado, el cual apoya sus arbitrarias acciones». PETRAS, James, *El informe Petras...*, op.cit., pp. 27 y 33, respectivamente.

¹¹⁷ «[P]ero sobre todo hay ahora mismo un gran depósito de desesperación oculta que puede dar una sorpresa a aquéllos que han escritos a vuelapluma sobre la generación joven [...]. La contradicción entre haberse criado entre algodones y un futuro incierto genera un miedo y frustración social en los jóvenes trabajadores que, si no se encauza a través de la política de clase, puede degenerar en violencia individualizada». *Ibidem*, pp. 4 y 50, respectivamente.

¹¹⁸ Como traería a colación ‘Cándido’ el proceso de «decadencia sindical» no escaparía a la «perspicacia de Felipe González», quien lo utilizaría en su provecho. CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de la rosa. El poder y la época (1982-1996)*, 2ª ed., Barcelona, Planeta, 1996, p. 21. Aunque más tarde se abordará con profundidad dicha cuestión, una visión general sobre dicha problemática sería abordada en su día por, CERVINO CUERVA, Emma, *Políticas de representación sindical: UGT y CCOO ante el empleo temporal (1977-1997)*, Tesis doctoral, Madrid, Centro de Estudios Avanzados Sociales Juan March, 2003.

¹¹⁹ SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, *Los empresarios y el conflicto laboral: del cierre a la defensa de la producción*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006.

¹²⁰ BURAWOY, Michael, *El consentimiento en la producción: los cambios del proceso productivo en el capitalismo monopolista*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989 [*Manufacturing consent. Changes in the labor process under monopoly capitalism*, Chicago, The University of Chicago Press, 1979]. Ha de destacarse, una vez más, que el autor llevaría a cabo su trabajo mediante una investigación cualitativa. Una visión marxista en: EDWARDS, Paul K., *El conflicto en el trabajo. Un análisis materialista de las relaciones laborales en la empresa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990 [*Conflict at work. A materialist analysis of workplace Relations*, Oxford, Basil Blackwell, 1986]. Asimismo han de reseñarse una de las obras centrales al respecto: BRAVERMAN,

Un contexto de debilitamiento del hecho sindical producido, en gran parte, ante la *desmovilización* –tanto desde *abajo* como desde *arriba*– y la posterior *integración* de la clase obrera en el conjunto del sistema¹²¹. Un fenómeno de carácter internacional como en su día detallara Beverly Silver en *Fuerzas de trabajo*¹²². Un fenómeno histórico en España asociado al final del “ciclo de luchas” y cuyos últimos capítulos acontecerán durante la época socialista. Un proceso, por lo demás, que tendrá en la Huelga General del 14 de diciembre de 1988 el último episodio de una vieja solidaridad obrera en declive, aunque ya sin margen posible de revertir la situación¹²³. De esta forma, nos situamos ante el “círculo vicioso de la precariedad”, que terminará poniendo fin –como examinaremos en los diferentes capítulos de esta investigación– a la “cultura militante obrera” de procedencia antifranquista, y con ella a la desaparición de una parte central de la memoria social democrática colectiva¹²⁴. Se asiste, en suma, al fin de la centralidad del movimiento obrero como sujeto histórico y de la clase obrera como sujeto político. Todo ello, con una particularidad tan característica de este tiempo: «Por primera vez, el capitalismo no conspiraba en España contra el socialismo, al tiempo que mostraba una sutil y paciente suspicacia hacia sus propios representantes políticos»¹²⁵.

Fracturado el horizonte del progreso indefinido así como los modelos de reproducción social típicos de las sociedades contemporáneas desde la segunda mitad del siglo XX, la “cultura de la precariedad” nos lleva, casi de forma inexorable, también a no pocos procesos de

Harry, *Trabajo y capital monopolista: La degradación del trabajo en el siglo XX*, México, Nuestro Tiempo, 1987 [*Labor and monopoly capital: the degradation of work in the twentieth century*, New York, Monthly Review Press, 1974]. Por último, LINCOLN, James R. y KALLEBERG, Arne L., *Culture, Control and Commitment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

¹²¹ Ilustrativos al respecto son dos trabajos que cubren nuestro periodo, y que vinieron a plantear una serie de hipótesis a día hoy vigentes: WAISMAN, Carlos H., *Modernización y legitimación. La incorporación de la clase obrera al sistema político*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1980; y, FISHMAN, Robert M., *Organización obrera y retorno a la democracia en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1996 [*Working-Class Organization and the Return to Democracy in Spain*, Ithaca, Cornell University Press, 1990]. A ello debe añadirse el trabajo pionero de, PÉREZ DÍAZ, Víctor, *Clase obrera, partidos y sindicatos*, Madrid, Instituto Nacional de Industria, 1980. También en: CRUZ ROCHE, Ignacio, DESDENTADO, Aurelio y RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, *Política social y crisis económica. Aproximación a la experiencia española*, Madrid, Siglo XXI, 1985. Una visión teórica de primer nivel en: HABERMAS, Jürgen, *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Buenos Aires, Amorrurtu, 1973 [*Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973].

¹²² SILVER, Beverly J., *Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1970*, Madrid, Akal, 2005 [*Forces of Labor. Movements and Globalization since 1870*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003]. Allí concluiría: «Durante el pasado siglo, las movilizaciones se veían alimentadas por la creencia de que los trabajadores cuentan efectivamente con cierto poder y de que éste puede utilizarse para transformar eficazmente sus condiciones de trabajo y de vida. Lo que la globalización ha conseguido, más que cualquier cosa, es ‘vaciar esa creencia de más de un siglo en el poder obrero’ y crear un entorno discursivo que ha desinflado espectacularmente la moral política y la voluntad de luchar por el cambio». *Ibidem*, p. 29.

¹²³ En primer término: BABIANO, José y MOSCOSO, Leopoldo, “Los conflictos sociales en fase depresiva ante la adopción de políticas de ajuste: El caso español”, *Zona Abierta*, nº 56, (1991), pp. 121-173; y, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “El Movimiento Obrero en la España del tiempo vivido: del *sujeto político* al nuevo «precariado»” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y id. (coord.), *Manuel Tuñón de Lara...*, *op.cit.*.

¹²⁴ Véanse aquí las tesis manejadas por: DOMÈNECH, Xavier, *Clase obrera, antifranquismo y cambio político. Pequeños grandes cambios, 1956-1969*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008; e igualmente por, RADCLIFF, Pamela Beth, *Making democratic citizens in Spain: civil society and the popular origins of the Transition, 1960-78*, London, Palgrave, 2011.

¹²⁵ CANDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, *op.cit.*, p. 107.

exclusión y violencia social¹²⁶. Y, asimismo, conlleva el cuestionamiento y debilitamiento del “insuficiente” Estado del Bienestar del que siempre habla Vicenç Navarro¹²⁷. Un proceso que más allá de las formulaciones de orientación socialdemócrata en torno a la aparición de la “sociedad de los dos tercios”¹²⁸, revela, por el contrario, la profunda transformación de los mecanismos de explotación del trabajo¹²⁹.

Estos son los puntos de llegada de nuestra investigación. Lo que nos corresponde, por tanto, es (re)construir los antecedentes históricos. Invertir el camino lógico deductivo sociológico aplicado por Petras en su *Informe* y traducirlo a términos históricos, es el objetivo de la presente investigación. Una inversión que irá desde el estudio de la estrategia de la modernización socialista, pasando por los antecedentes de la “legislación antitrabajo” a través del examen del dogma/ideología de la flexibilidad, para historiar globalmente la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 como el punto de partida básico¹³⁰.

Identificado el *nodo central* de la investigación, atañe también delimitar los “elementos” centrales que conforman esta investigación. En primer lugar, los *actores y sujetos* históricos básicos. Ahí, precisamente, aparece el socialismo español en su conjunto. Un actor histórico colectivo en donde se hace, al menos, necesario diferenciar tres grandes bloques: a) El Partido Socialista Obrero Español (PSOE); b) la Unión General de Trabajadores (UGT); y c) propiamente los ejecutivos socialistas. A partir donde se estudiará, desde una perspectiva de historia política, sus diferentes transiciones hacia el poder, y una vez ahí, las políticas adoptadas en sus diferentes ámbitos. Es decir, se presenta, una historia política, pero también social y

¹²⁶ De cara a entender estas mismas estrategias, BOURDIEU, Pierre, *Las estrategias de la reproducción social*, Madrid, Siglo XXI, 2011 [“Stratégies de reproduction et modes de domination”, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, vol. CV, (1994), pp. 3-12]. E igualmente, PICCHIO, Antonella, *Social reproduction: the political economy of the labour market*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

¹²⁷ Más allá de las obras más conocidas de Vicenç Navarro –entre otras, *Neoliberalismo y estado del bienestar*, 3ª ed., Barcelona, Ariel, 2000; *Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país*, Barcelona, Anagrama, 2002; *Subdesarrollo social de España: causas y consecuencias*, Madrid, Anagrama, 2006– véase su dirección al frente de la obra colectiva, *La situación social en España*, en tres volúmenes (vol. I (2006), vol. II (2007) y vol. III, 2009 [publicas en Madrid por Biblioteca Nueva y la Fundación Francisco Largo Caballero en relación al tercer volumen]). En una similar línea, COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de, con la colaboración de MATEOS, Emma], *Barómetro social de España: análisis del periodo 1994-2006: a partir de un sistema de indicadores*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008.

¹²⁸ Uno de sus promotores en España, desde una óptica socialdemócrata-liberal, en: ESPINA, Álvaro, *Modernización y estado de bienestar en España*, Madrid, Fundación Carolina / Siglo XXI, 2007. Un fenómeno observado tempranamente por, HOBBSAWM, Eric, “La emancipación de la humanidad. Eric Hobsbawm entrevistado por Peter Glotz” en *Política para una izquierda racional*, Barcelona, Crítica, 2000, p. 173 [*Politics for a Rational Left. Political writing 1977-1988*, London, Verso / Marxism Today, 1989].

¹²⁹ Consúltense los aportes de: GUERRERO, Diego, *La explotación. Trabajo y Capital en España (1945-2001)*, Barcelona, El Viejo Topo, 2006; HUSSON, Michel, *Capitalismo puro*, Madrid, Maia, 2009 [*Un pur capitalisme*, Lausanne, Page Deux, 2008]; y, GILL, Louis, *Fundamentos y límites del capitalismo*, Madrid, Trotta, 2002 [*Fondements et limites du capitalisme*, Montréal, Les Éditions du Boréal, 1996]. Una visión global de la aplicación del concepto marxista de *explotación* en la obra clásica de, SWEEZY, Paul M., *Teoría del desarrollo capitalista: principios de la economía política de Marx*, México, Fondo de Cultura Económica, 1970 [*The Theory of Capitalist Development: principles of Marxian political economy*, London, D. Dobson, 1946]. Otra lectura clásica que conserva toda su vigencia en: IBÁÑEZ, Jesús, “Hacia un concepto teórico de «explotación»”, *Sistema*, nº 53, (1983), pp. 39-56. Y, claro está, la ya citada obra de, ROEMER, John E., *A general theory of...*, *op.cit.*.

¹³⁰ PETRAS, James, *El informe Petras...*, *op.cit.*, p. 28. Al respecto resulta de enorme interés, GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, *La producción de Mitos y Milagros. La reestructuración del trabajo desde los años ochenta*, Tesis Doctoral, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001.

económica del socialismo español contemporáneo. Una reconstrucción histórica que huye de cierta literatura anecdótica, que tanto ha predominado hasta el momento. Una aproximación que, pese a tener más que presente la bibliografía existente sobre la corrupción endémica, las fluidas relaciones con la “beautiful people” –verdadero poder económico del país– el terrorismo de Estado o simplemente los reiterados abusos de poder hasta convertir al PSOE en un *Partido-Estado*¹³¹, se interna por otros senderos¹³². Aproximaciones, que ante todo rehúyen del populismo que caracterizarían la labor informativa-propagandística antes que política de los socialistas –“Nosotros, los descamisados”, proclamaría Alfonso Guerra en 1989 en un mitin electoral– antes, durante y después de gobernar.

Un relato, a través de una visión global, que va desde las decisiones políticas que se adoptan en las cúspides del partido y del sindicato “hermanos”, pasando por configuración de los propios gabinetes ministeriales, así como por la propia elaboración de los equipos económicos y, claro está, la puesta en marcha de las “medidas” que se adoptan. En concreto, se examinará en profundidad el papel que jugarían tanto el Equipo Económico de Boyer –y más tarde de Solchaga– a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y, de la misma forma, el propio equipo de Almunia y su gabinete en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En segundo término, el resto de los actores históricos fundamentales de esta tesis doctoral son los conocidos “agentes sociales”. Principalmente, Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En un plano secundario, asimismo, nos encontramos con los gobiernos de UCD –especialmente en su vertiente económica y laboral– y en términos generales con la oposición política. Nos movemos, por tanto, a caballo entre una historia política y social de la vida parlamentaria e institucional así como del movimiento obrero.

Por otro lado, en relación a las fechas cronológicas dos son los parámetros en que se sitúa esta investigación. Las fechas centrales van de 1982 a 1992. A saber, la varias veces denominada “década del cambio” socialista. En cualquier caso, esta elección responde, en lo básico, a la propia duración en el tiempo de la propia reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 en sus aspectos centrales, en tanto entre 1992 a 1994 se acometería la segunda gran reforma laboral por parte de los socialistas. Por otro, las fechas secundarias serán las siguientes. Primero, las que se sitúan entre 1972 a 1982, periodo en que se asiste a la propia transición del socialismo, tanto a nivel interno como en lo referido a su particular vía de conquista del poder político. Un tiempo especialmente interesante, y caracterizado por la radical transformación política, ideológica, programática y discursiva del socialismo, que pasaría en un tiempo record de un socialismo marxista radical a un programa progresista antes que socialdemócrata, que bajo el rótulo de *El Cambio* arrasaría electoralmente el 28 de octubre de 1982¹³³. Y en segundo lugar, los años entre 1992 y 1996, de cara a examinar en toda su amplitud la “época socialista”.

¹³¹ PETRAS, James, “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y id. (eds.), *Mediterranean Paradoxes. Politics and Social Structure in Southern Europe*, Oxford, Berg Publishers, 1993, p. 101. Igualmente, ROYO, Sebastián, *From social Democracy to Neoliberalism. The consequences of Party Hegemony in Spain, 1982-1996*, London, Palgrave Macmillan, 2000. En una línea más moderada aunque no exenta de una fuente carga de ironía: GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Alianza, 1991 [*The Spanish Socialist Party: a history of factionalism*, Oxford / New York, Clarendon Press / Oxford University Press, 1989].

¹³² La literatura que se ha internado por todos estos aspectos es, efectivamente, asombrosa. Un ejemplo de este tipo de visiones ‘tóxicas’, aunque ciertamente ‘ilustrativas’ de los reiterados abusos de poder, corrupciones y miserias políticas en: HERRERA, José Díaz y DURÁN, Isabel, *Pacto de silencio: la herencia socialista que Aznar oculta*, Madrid, Temas de Hoy, 1996. Unos años antes, y desde otra óptica: id. y TIJERAS, Ramón, *El dinero del poder: la trama económica de la España socialista*, 6ª ed., Madrid, Cambio 16, 1991.

¹³³ A modo de ejemplo y de curiosidad: Felipe González escribiría en la contraportada del disco, *Salud PSOE* de Julio Malito –editado en Alemania en 1976– un alegato más propio del Che Guevara que

Tres son nuestros interrogantes fundamentales. Cuestiones que responden a otras tantas hipótesis de trabajo como tiempo tendremos de ver¹³⁴. ¿Qué papel histórico decidió jugar el PSOE al frente del Gobierno en el proceso de salida a la crisis económica procedente de los setenta? Una pregunta que nos abre la primera hipótesis de trabajo denominada como la “misión histórica” del socialismo español, y a la que estará dedicada el II Epígrafe a través de los capítulos 4 y 5. ¿En torno a qué objetivos centrales basculó el proyecto de modernización socialista en la apertura y consolidación de una nueva etapa en la historia del capitalismo español? De cara a responder a tal interrogante se ha formulado la segunda hipótesis: la interpretación de los gobiernos socialistas como un actor histórico clave en el proceso de reestructuración del nuevo modelo de producción. Una hipótesis que parte del examen del carácter “de clase del Estado” en una perspectiva *gramsciana* antes que *leninista*¹³⁵. El epígrafe III, y concretamente los capítulos 6, 7 y 8 tratan de responder a lo anterior. ¿Cuáles fueron los principales costes sociales y humanos de las políticas reformistas-liberales de los ejecutivos socialistas? Dicha cuestión nos lleva a nuestra tercera hipótesis: el análisis de las consecuencias de la transformación radical de las relaciones capital-trabajo. Los capítulos 9, 10, 11 y 12 dentro del IV Epígrafe ofrecen un amplio conjunto de respuestas al mismo.

Mientras que los anteriores interrogantes nos permitirán afrontar globalmente el contexto general, será a partir del análisis histórico de las modificaciones legislativas del marco de relaciones laborales, que se operan desde el fin de la dictadura hasta la citada reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984, junto con el Acuerdo Económico y Social de 1985; en donde aparecen las repetidas *bases históricas* del cambio social y generacional que expusiera el propio Petras en *Padres-Hijos*. Dicho esto, ¿resultaría tan importante a nivel histórico y socioeconómico la reforma del Estatuto de los Trabajadores del año ochenta y cuatro para

de un abogado laboralista líder de un débil Partido Socialista: «El socialismo ha luchado siempre por liberar al hombre de sus cadenas socioeconómicas. De esta ruptura surgirá necesariamente un hombre nuevo: individuos que parten de sí mismos dentro de unas relaciones y condiciones históricas socialistas». De ahí a lo que sucedería en el XXVIII Congreso extraordinario de 1979 y poco tiempo después en el XXIX Congreso, no transcurrían ni cinco años.

¹³⁴ Nos detendremos en profundidad en todas estas cuestiones en el apartado, “2.1. Nuestros caminos de aproximación: interrogantes e hipótesis de trabajo”.

¹³⁵ «El Estado se convierte así en propietario único del instrumento del trabajo, asume todas las funciones tradicionales del empresario, se transforma en una máquina impersonal que compra y distribuye las materias primas, que impone un plano de producción, que compra los productos y los distribuye: el estado burgués de los burócratas incompetentes e irrevocables: el Estado de los politicastos, de los aventureros, de los sinvergüenzas”. GRAMSCI, Antonio, “El instrumento de trabajo” en *Antología...*, *op.cit.*, p. 70 [1920]. Como explicará años más tarde Göran Therborn la importancia de esta concepción reside en lo siguiente: «Los marxistas se interesan por la relación entre clases y el poder del Estado a causa de una razón muy concreta. Para ellos el Estado es una institución material, separada, que funciona como punto nodal de las relaciones de poder existentes dentro de la sociedad. El Estado en cuanto tal no posee poder alguno: es una institución en la que se concentra y ejerce el poder social». THERBORN, Göran, *¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estado y poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo*, México, Siglo XXI, 1979, p. 155 [*What does the ruling class do when it rules?: State Apparatuses and State Power under Feudalism, Capitalism and Socialism*, London, New Left Book, 1978 (recientemente reeditado, London / New York, Verso, 2008)]. Por su parte, Lenin en *El Estado y la Revolución* describiría dicha relación de la siguiente forma: «El Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase *no pueden*, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables». LENIN, Vladimir, *El Estado y la revolución*, Madrid, Alianza, 2008 [1917], p. 41. O explicado más sencillamente: «El Estado tiene como objetivo principal el de reproducir el sistema existente para beneficio de su clase dominante. En la actualidad, se trata de reproducir el capitalismo como sistema económico y social». BADENES, Xavier, ETXEZARRETA Miren, GORDILLO, Iván [et al.], “La estrategia del capital”, *Seminari d'Economia Crítica TAIFA*, nº 8, (2011), p. 8. De especial interés dentro de ese volumen el apartado, “La relación entre el Capital y el Estado. La naturaleza del Estado” (pp. 7-13).

explicar las propias tesis de Petras? ¿Acaso no ha habido otras reformas laborales así como otros hitos socioeconómicos que hayan modificado de forma sustancial el ordenamiento jurídico laboral? Puede llegado el caso, ¿una reforma laboral publicada en el Boletín Oficial del Estado llegar a transformar por sí sola la realidad laboral y social de un país entero?

A lo largo de estos últimos años no sólo ha habido más de media docena de reformas laborales de calado, sino cerca de medio centenar de modificaciones de aquella Ley del Estatuto de los Trabajadores, publicada en el BOE un 14 de marzo de 1980¹³⁶. Como recordaba en su día el escritor y periodístico Juan José Millas tras tantos años de cambios legislativos, “la reforma laboral del mercado de trabajo, es como la unidad de España: ustedes nacieron oyendo hablar de ella y se morirán oyendo hablar de ella”¹³⁷. Un largo tiempo en el que se ha desarrollado una iconografía propia en cada apertura de cada nueva reforma laboral –a través del llamado “diálogo social”– hasta constituirse en un episodio periódico sistémico con sus particulares protagonistas, etapas, ritmos e idas y venidas... Inclusive se ha llegado a calificar cada episodio relacionado con cada reforma laboral de una “telenovela” interminable¹³⁸. En suma, la concertación social se ha transformado en una gran representación político-mediática, siempre en busca del “preciado” fin de la fotografía metafórica del “diálogo” y de la “paz social”. Reformas, como traía a colación el también escritor Isaac Rosa, que han terminado por generar todo un conjunto de imágenes colectivas compartidas:

«[L]os trabajadores hemos desarrollado un resorte que salta en cuanto oímos las dos palabras malditas: ‘reforma laboral’. Nos ponemos de uñas, erizamos el lomo y se nos dilatan las pupilas [...]. [T]enemos la lección aprendida y sabemos que en España reforma laboral es eufemismo viejo»¹³⁹.

Sin querer hacer de nuestra tesis, o mejor dicho de nuestra punto de partida investigador, una cuestión de importancia universal –como en su día lo concibiera la propia Rossana Rossanda– a nuestro juicio –tal y como trataremos de evidenciar– tal modificación legislativa sería decisiva en tres aspectos básicos, que irán mucho más allá de la mera publicación de la Ley 32/1984 un 4 de agosto en el B.O.E.¹⁴⁰. Aunque la propia RET’84, en términos generales, ha sido catalogada como una reforma laboral importante, no obstante ha quedado en un plano secundario frente a la de los años 1994 y 1997, por tan sólo citar dos ejemplos. Y, sin embargo, es a partir de la misma, junto con su posterior desarrollo reglamentario, en donde se consolidan los nuevos *hábitos* y *costumbres* de los empresarios. La RET’84, por tanto, supone un *punto de inflexión* clave en el proceso de progresiva liberalización del ordenamiento jurídico-laboral. Y a su vez con la propia reforma laboral del año ochenta y cuatro da comienzo lo que en su día Antonio Baylos denominara como la “huida del derecho del

¹³⁶ Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores* [B.O.E. 14 de marzo de 1980]. Recientemente un *informe* de la Fundación 1º de Mayo realizaba un exhaustivo conteo de todos los cambios de la citada Ley 8/1980, estimando en cincuenta y dos las reformas laborales desde 1980 al año 2012. FUNDACIÓN 1º DE MAYO, *Las reformas laborales en España y su repercusión en materia de contratación y empleo. Cincuenta y dos reformas laborales desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980*, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2012.

¹³⁷ MILLÁS, Juan José, “El aspecto crea la función”, *El País Semanal*, 14 de agosto de 2005.

¹³⁸ RUESGA, Santos M., PÉREZ INFANTE, Ignacio y VALDÉS DAL-RE, Fernando, “¿Qué reforma laboral?”, *El País*, 10 de febrero de 2012.

¹³⁹ ROSA, Isaac, “El calabobos de la reforma laboral”, *Público*, 25 de noviembre de 2009. Más recientemente, dos antiguos ministros socialistas de Trabajo publicaban en *El País* un artículo sobre las reformas laborales acontecidas en España. E iniciaban su texto de la siguiente forma: «Si hay un lugar común en la historia de nuestras reformas laborales durante el último tercio de siglo ha sido su instrumentación como respuesta –en ocasiones paranoica– a las situaciones de crisis experimentadas por la economía española». GÓMEZ, Valeriano y MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “Los equívocos del contrato único”, *El País*, 24 de enero de 2012.

¹⁴⁰ Ley 32/1984, de 2 de agosto, *sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores* [B.O.E. 4 de agosto de 1984].

trabajo”¹⁴¹. Resumiendo, la RET’84 tiene un impacto social, simbólico y psicológico poco valorado en los términos anteriormente descritos.

De la misma forma, la introducción de una flexibilización radical del marco de relaciones laborales¹⁴² –asociada a su vez al proyecto de “modernización socialista” y a la discursiva de su tiempo basada en el binomio *solidaridad y sacrificio*– tendrá otra consecuencia deseada o no deseada –según se quiera interpretar– dentro de las normas que rigen el mercado de trabajo: la constatación del progresivo deterioro de las relaciones laborales en una perspectiva de no recuperación y de continuado empeoramiento. Una tónica que no ha dejado de reproducirse desde las fechas en las que nos movemos. La ruptura –perceptible, simbólica y real– con todo un proceso histórico de recuperación y conquista de derechos laborales y sociales desde el inicio de la transición sindical –como tiempo tendremos de examinar– se viene abajo a partir de este mismo “hito” legislativo. Joaquín Arriola y Luciano Vasapollo supieron captar este proceso de forma acertada: “Sería por tanto la pérdida de esa capacidad de establecer límites a la explotación lo que se ha instalado en el inconsciente colectivo de los trabajadores y se vive como una pérdida, una derrota histórica”¹⁴³.

Definida, en más de una ocasión como una “verdadera revolución liberal de la economía española”¹⁴⁴, la RET’84 sustentada en una visión propiamente liberal de la ideología de la flexibilidad, no sólo modificará los mecanismos de entrada, permanencia y salida del mercado de trabajo, sino que dualiza significativamente en dos grandes sectores/bloques a la clase trabajadora, hasta constituir las propias bases históricas de lo que en más de una ocasión hemos definido como la “generación de la precariedad”¹⁴⁵. Y dentro de ahí, el sector más afectado va a ser la clase trabajadora juvenil, a la hora de afrontar su inserción y permanencia en el mundo de trabajo, bajo unas condiciones y perspectivas radicalmente diferentes de la generación que la

¹⁴¹ BAYLOS, Antonio, “La «huida» del derecho del trabajo: tendencias y límites de la deslaboración” en ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y MIRÓN HERNÁNDEZ, Mª del Mar (coords.), *El trabajo ante el cambio de siglo: un tratamiento multidisciplinar (aspectos laborales, fiscales, penales y procesales)*, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 35-54. Del mismo autor véase su obra de referencia, inclusive pasados tantos años de su publicación: id., *Derecho del trabajo, modelo para armar*, Madrid, Trotta, 1991. Y, lógicamente, consúltese la magistral obra de, ROMAGNOLI, Umberto, *El derecho, el trabajo y la historia*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1997.

¹⁴² Al respecto, BOYER, Robert, “¿Flexibilidades defensivas... u ofensivas?” en id. (dir.), *La flexibilidad del trabajo en Europa: un estudio comparativo de las transformaciones del trabajo asalariado en siete países, entre 1973 y 1985*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986, pp. 277-311 [*La flexibilité du travail en Europe, Une étude comparative des transformations du rapport salarial dans sept pays de 1975 à 1985*, II vols., Paris, Le Découverte, 1986, vol. II].

¹⁴³ ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, *Flexibles y precarios...*, op.cit., p. 13. Uno de los mejores ejemplos de este descenso generalizado homogéneo de derechos sería el referéndum que los trabajadores de la FIAT en Turín realizaron en enero de 2011. Tras una votación ajustada –a favor el 54,05% y en contra el 45,95%– los trabajadores aprobarían un ostensible recorte de derechos laborales, para evitar que la planta de producción fuera trasladada a Polonia. Un hecho que todavía cobra una mayor relevancia simbólica dado que la fábrica de coches de FIAT se convertiría, en su momento, en todo un referente de las luchas del movimiento obrero italiano. Véase, al respecto, ROMAGNOLI, Umberto, “El ambiguo compromiso del Acuerdo Interconfederal italiano del 28 de junio de 2011”, *Revista de Derecho Social*, nº 55, (2011), pp. 13-24. Por otro lado, tal y como ha traído a colación el mismísimo Noam Chomsky sí algo nos indica esta situación es, precisamente, el incremento de la *class war*, aunque ahora en una sola dirección: «Lo cierto es que los dirigentes empresariales y sus asociaciones en otros sectores de las élites dominantes estaban constantemente dedicados a una siempre presente guerra de clases que se convirtió en unilateral, sólo en una dirección, cuando sus víctimas abandonaron tal lucha [obrera]». CHOMSKY, Noam, “Prólogo” en NAVARRO, Vicenç, TORRES LÓPEZ, Juan y GARZÓN ESPINOSA, Alberto, *Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España*, Madrid, Sequitur / ATTAC, 2011, p. 9.

¹⁴⁴ MARTÍN CRIADO, Enrique, *Producir la juventud...*, op.cit., p. 146.

¹⁴⁵ Véase, de nuevo, la nota 87.

precedió. Los datos económicos y laborales –como avalan las más de doscientas estadísticas en forma de gráficos y cuadros que se presentan en esta investigación– dibujan las propias realidades macroeconómicas que el propio James Petras o Richard Sennett también supieron captar a nivel de la calle o en los propios centros de trabajo. En cualquier caso, todo lo anterior nos lleva a una pregunta que a día hoy sigue sin haberse contestado de forme definitiva: ¿hasta qué punto y de qué forma pueden atribuirse tanto a la RET’84 como al resto de las reformas laborales, los principales resultados del mercado de trabajo? O dicho de otra forma: ¿qué tipo de impacto real –a nivel estrictamente laboral– tuvieron esta y otras reformas en la mejora y/o el empeoramiento del funcionamiento del mercado de trabajo?

Englobadas, generalmente, las múltiples reformas laborales dentro de la denominada “concertación social”, hasta el momento su estudio desde la perspectiva historiográfica resulta, en la práctica, inexistente. A pesar que no han faltado algún que otro estudio desde la perspectiva de la politología, y, concretamente, desde el derecho laboral, los mismos han tendido a bordear el trasfondo de las propias reformas laborales. No por ello faltan referencias, remarcamos. De nuevo, la mayor parte de tono ensayístico y memorialístico por parte de los propios protagonistas, más preocupados por explicar los resultados finales y justificar determinadas decisiones, que de internarse por las interioridades de las negociaciones.

Una vez más, la bibliografía mayoritaria disponible, no deja de responder a un enfoque dominante, otra vez en *tono consensualista acrítico*, más preocupada en glosar las supuestas conquistas de la “paz social” de cada reforma laboral, de cada acuerdo interconfederal, de cada acuerdo social, que en desgranar los porqués, los cómo así como los efectos y resultados de cada proceso. Así los estudios a los que nos estamos refiriendo han venido, de nuevo, a *justificar* lo que Petras llamara la “retórica [...] «concertación social» para dar una apariencia de legitimidad a políticas ya decididas y puestas en práctica por el Ministerio de Economía”¹⁴⁶. Además con dos características añadidas. Pues estas *miradas* en torno a los procesos de concertación social, han tendido a ser *sectarias* y *excluyentes*, tal y como ha sucedido tanto en nuestro objeto de investigación como mismamente en su antecedente primigenio: el Estatuto de los Trabajadores¹⁴⁷. Igualmente, dichas visiones han tendido a reforzar la tesis de la “única

¹⁴⁶ PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español, camino de Marbella (y dos artículos sobre los problemas de la transición al socialismo)*, Madrid, Revolución, 1990, p. 52. Por su parte, el sociólogo Pablo López Calle destacaría la gran paradoja de este tiempo: «Se da la circunstancia, por ejemplo, de que actualmente Gobiernos como el español están abogando por introducir cada vez más aspectos relacionadas con la regulación del mercado y las condiciones de trabajo en el llamado ‘diálogo social’ entre empresarios y trabajadores. Dicho de otra manera, justo cuando más protagonismo formal se da a los trabajadores para intervenir en la regulación de las condiciones de trabajo, más posibilidades tienen de perder derechos y protecciones históricamente alcanzados». LÓPEZ CALLE, Pablo, *La desmovilización general...*, op.cit., p. 122. Una obra básica que viene a reforzar las tesis de Petras más de una década después de su publicación, y, de nuevo, mediante una investigación cualitativa.

¹⁴⁷ En el XXV Aniversario de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980, no faltarían las correspondientes celebraciones y homenajes. Efemérides con el consabido *tono* tan propio del *modelo canónico de la transición*. Por ejemplo, en los promovidos tanto por el Ministerio de Trabajo y por la Fundación Francisco Largo Caballero, en ninguno de ellos aparecería testimonio o relato por parte de los entonces dirigentes de Comisiones Obreras y el Partido Comunista de España. Precisamente, el sindicato y partido, que más combatieron en la calle así como en el Congreso su contenido durante sus largos meses de negociación. Por no estar, no estaba ni Santiago Carrillo, uno de sus protagonistas fundamentales y hoy convertido en un actor clave de la narrativa del citado ‘modelo canónico de la transición’. Una historia que ha tenido también episodios similares, y que parece responder a que quien no está en la fotografía final –«El que se mueve, no sale en la foto»–, sentenciaría Alfonso Guerra años después– tampoco debe aparecer en los correspondientes libros conmemorativos. RUESGA, Santos M., VALDÉS DAL-RÉ, Fernando y ZUFIAUR, José M^a (coords.), *Transformaciones laborales en España: a XXV años de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005; SARACÍBAR, Antón [et al.], *25 años del Estatuto de los Trabajadores (1980-2005)*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2005.

política posible”, a la hora de justificar –antes que explicar– la elección de la vía de la flexibilización liberal en cada modificación jurídico-laboral.

Frente a estas visiones que tienden a rechazar de plano la visión conflictiva de los procesos históricos –o directamente los omiten– los que no viene a demostrar la RET’84 así como el AES –aunque otro tanto se podía decir del ABI, AMI, ANE...– son duras batallas políticas, sindicales y sociales contra la extensión de la contratación temporal. Todavía más, pues, como se evidencia en nuestro caso de estudio, las citadas *miradas* han fijado su visión, por lo general, en una visión institucionalista que ha conllevado la exclusión de otros dos ángulos claves: primero, las negociaciones secretas –o “reservadas” como se llamarían en este tiempo– que viene a explicar lo *sustancial* de los acuerdos alcanzados; segundo, en muy pocas ocasiones se han detenido a examinar las manifestaciones, las movilizaciones o las asambleas de los propios trabajadores, en contra de los procesos negociadores y sus resultados.

Nos interesa sobremanera, por tanto, internarnos por lo que Karl Marx llamaría las “minucias” y “sutilezas” de un instrumento clave en los procesos de producción, para avanzar en una “anatomía micrológica”¹⁴⁸. Procesos de contestación, que por más que resultarán en su mayor parte serios fracasos organizativos y políticos, resulta que al anular este *ángulo de visión* los análisis que se pueden localizar resultan limitados e incompletos. No han faltado dentro de esta literatura el predominio de las anécdotas o directamente los chascarrillos, poco relevantes para el conocimiento histórico. Sin tener presente, al mismo tiempo, la responsabilidad histórica de los negociadores, nombre por nombre, en su mismo presente. Todo lo cual ha conducido, por ejemplo, que en dicho ámbito se haya omitido la “guerra sindical” –así calificada desde la prensa, como por parte de los propios interesados– entre los dos sindicatos mayoritarios. O también se haya pasado por alto determinadas campañas de intoxicación informativa/política orquestadas desde el propio Gobierno o desde determinados medios de comunicación, de cara a la exclusión de uno de los agentes negociadores –en nuestro caso, Comisiones Obreras– y lograr la resolución de las negociaciones de la forma más rápida posible. Aquí, a buen seguro, no se llegaría a emplear los servicios secretos contra el “oponente” político/sindical, tal y como haría Margaret Thatcher para aniquilar las huelgas de los mineros británicos¹⁴⁹. Ahora bien, no se escatimarían otros instrumentos maquiavélicos. Detrás de cada una de estas negociaciones se visualiza la política en estado puro así como sus “suciedades” y “cloacas”. De ahí la cita inicial con la que se abre el capítulo 9: “Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respecto a medida que sabes cómo están hechas”.

No termina aquí la importancia histórica de la RET’84. La estructura legislativa de la RET’84 sería traslada a otros países como en Argentina a principios de los noventa. A través de la aprobación de la *Ley de Contrato de Trabajo* de 1991 (Ley 24.013) y la *Ley de Fomento del Empleo* en 1995 (Ley 24.465), se llevaría a cabo la implantación de dicho modelo laboral. Una especie de venta de “Know How” por parte de los técnicos socialistas, quienes siempre se mostrarían orgullosos de sus “éxitos”. Por cierto, sin grandes disimulos, aquella operación se realizaría a través de la Consejería Laboral de la Embajada en Buenos Aires. Incluso dentro de esta misma *operación* se llegaría a editar una revista en formato de número monográficos –titulada, *Cuadernos Laborales de América y España*– de cara a introducir en el mercado de las ideas las “virtudes” de la modernización laboral vía flexibilidad radical¹⁵⁰. Un proceso histórico

¹⁴⁸ MARX, Karl, “Prólogo a la primera edición” en *El capital...*, *op.cit.*, p. 6.

¹⁴⁹ No deje de consultarse: MILNE, Seumas, *The enemy within: Thatcher’s Secret war against the Miners*, London, Verso, 2004.

¹⁵⁰ Aunque tan sólo se publicaría unos pocos volúmenes, no debe minusvalorarse su importancia. En el primer monográfico, por ejemplo, escribiría uno de los más destacados introductores de la flexibilización de las relaciones laborales del socialismo español: ESPINA, Álvaro, “La política activa de recursos humanos: formación del empleo, formación profesional y protección del desempleo (la experiencia española)”, *Cuadernos Laborales de América y España*, (1990) [Buenos Aires, Embajada de España, Consejería Laboral, 1990]. En cualquier caso, la figura principal en todo este entramado político-académico, sería un antiguo asesor de UGT y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y

que nos llevaría en su momento a una larga estancia en Buenos Aires para un estudio histórico comparativo, y cuyos resultados serán publicados tras esta investigación¹⁵¹.

Más allá de lo hasta ahora descrito, esta tesis doctoral viene a plantear al campo de la historia social contemporánea, cinco cuestiones que, a nuestro juicio, contribuirán a mejorar nuestro conocimiento sobre nuestra “historia inmediata”¹⁵². O como Julio Aróstegui lo definió en su día, en torno a nuestro “tiempo vivido”¹⁵³.

En primer término, se aborda con las necesarias garantías teóricas y metodológicas un tiempo histórico que, hasta el momento, no ha sido lo suficientemente atendido. Por más que resulte obvio lo mencionado, frente a la prolífica bibliografía con la que se cuenta para las épocas anteriores, no han dejado de existir ciertos recelos –a modo de fronteras *visibles* e *invisibles*– por parte de los historiadores de cara a abordar con todas sus consecuencias la “época socialista”. No faltan, en verdad, referencias centrales dentro del campo de la historiografía profesional¹⁵⁴. Aunque con la misma intensidad ha de afirmarse que la mayor parte de los trabajos de referencia se han quedado en la superficie de los acontecimientos históricos. Estaríamos, pues, ante un claro ejemplo las “cojeras” de la historia de las que hablara Edward Carr¹⁵⁵.

Tomamos aquí prestadas unas palabras del profesor Javier Tusell:

posteriormente Ministro de Trabajo en Argentina: Armando Caro Figueroa. Entre otras obras del mismo, imbuido de la *experiencia española*, escribiría: *La flexibilidad laboral: fundamentos comparados para la reforma del mercado del trabajo argentino*, Buenos Aires, Biblos, 1993; así mismo sus particulares memorias también resultan de interés para observar dicho proceso: *Modernización laboral. Cuadernos de un reformador empecinado*, Buenos Aires, Fundación de Trabajo, 1997. Otro de los pesos pesados de la política laboral de Argentina, tanto durante la época de Raúl Alfonsín como durante la de Carlos Menem, Enrique Strega publicaría una obra de referencia de cara a entender la clara influencia hispánica: STREGA, Enrique, *Sindicatos, empresarios, Gobierno y las reformas laborales. La discusión de la década (1989/1999)*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2000.

¹⁵¹ Entre julio a diciembre del año 2006 llevamos a cabo en la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de Jorge Saborido, la investigación: “Cambios y rupturas en los procesos de interacción generacional en las sociedades española y argentina durante los años de consolidación de la democracia (1982-1999). Un estudio histórico comparado de los procesos de modernización y dualización de los mercados laborales” [Traslado temporal a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) por Resolución del B.O.E. del 28 de diciembre de 2005 del Ministerio de Educación y Ciencia de España].

¹⁵² «La historia inmediata lleva a cabo una apertura efectiva hacia el presente; pero no modifica en nada las reglas habituales del juego del historiador. Incluso si es muy reciente, se trata siempre de un pasado exterior a nosotros». CHESNEAUX, Jean, *¿Hacemos tabla rasa...?*, op.cit., p. 202.

¹⁵³ Consúltese aquí el capítulo tercero, “Historia del presente e interacción generacional” de, ARÓSTEGUI, Julio, *La historia vivida: sobre la historia del presente*, Madrid, Alianza, 2004, pp. 109-142. E igualmente, RUIZ TORRES, Pedro, “El presente y la historia” en RÚJULA LÓPEZ, Pedro Víctor y PEIRÓ MARTÍN, Ignacio (coords.), *La historia en el presente [V Congreso de Historia Local de Aragón, Molinos, 2005]*, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2007, pp. 15-42; y, BERNECKER, Walther L., “Historia del presente: ¿de la «primera modernidad» a la «reflexiva»?” en CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo, FANDIÑO, Roberto G. y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Historia social, movimientos sociales y ciudadanía [VII Simposio Internacional de Historia Actual organizado por el Instituto de Estudios Riojanos en 2008]*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, pp. 35-60.

¹⁵⁴ Nos remitimos aquí al estado de la cuestión especializado presentado en el apartado “2.2.11. La historia académica y profesional: una agenda investigadora prácticamente por inaugurar”.

¹⁵⁵ «Cuando se lee un libro de historia, hay que estar atento a las cojeras. Si no logran descubrir ninguna, o están ciegos, o el historiador no anda». CARR, Edward H., “El historiador y los hechos” en *¿Qué es la...?*, op.cit., p. 69.

«El período de Gobiernos socialistas sigue siendo materia de debate político [...]. Lo lógico y saludable sería que ese período fuera considerado como etapa de la Historia Española de la que cabe extraer enseñanzas y hacer un balance ponderado»¹⁵⁶.

Así pues, se hace necesario que la “época socialista” pase a formar parte de nuestra “agenda investigadora”¹⁵⁷. No sólo han transcurrido tres décadas desde aquel 28 de octubre de 1982, sino que se dispone de un enorme *corpus documental* –inabarcable, cabría añadir¹⁵⁸– para afrontar estos años con las suficientes requisitos. Ciertamente, falta todavía un largo tiempo para que una parte fundamental de la documentación –la propia relativa al PSOE y al Gobierno socialista, aunque por razones de orden diferente– esté a disposición del investigador. “Claro que datos y documentos son esenciales para el historiador –escribía, de nuevo, Edward Carr–. Pero hay que guardarse de convertirlos en fetiches”¹⁵⁹.

Así en el momento en que supera la visión positivista, la documentación a examinar es más que considerable. No obstante, esta investigación parte de una serie de limitaciones llamémosles “documentales” y que se vinculan a la puesta en práctica de una posible –y viable– historia del presente vivido. Por más que en el subapartado “2.3.1. Anomalías, obstáculos jurídicos y demás voluntades políticas” se volverá a insistir sobre esta misma cuestión, quede dicho aquí que nada asegura que en los próximos años –o probablemente durante las siguientes décadas– todos los *papeles* de la época socialista lleguen a manos del ciudadano e investigador. A través de muy diferentes vías –que van desde las estrictamente jurídicas pasando por cuestiones más prosaicas (desde la destrucción de documentación al carácter patrimonialista de no pocos cargos que *privatizarían* en su momento determinados papeles y que hoy obran en sus archivos personales)– la documentación a la que se podrá acceder y consultar, a buen seguro, estará fragmentada, incompleta cuando no filtrada previamente. Nada nuevo dentro del modelo archivístico español –tanto público como privado–.

Una realidad con la que han convivido durante décadas los historiadores, y, que, aunque ha desanimado o cortocircuitado más de una investigación –o proyecto de– forma parte de las dificultades tradicionales de nuestro campo de estudio. Tal y como recientemente ha explicado la analista Jean-Marie Allin, a partir de lo que se conoce como la *Intelligence Economique*¹⁶⁰ –una *nueva forma* de interpretar y considerar el acceso a la información económica y que tiene una relación más que directa con lo que estamos diciendo aquí– existen –a grandes rasgos– tres tipos de datos en dicho ámbito: a) *Información de fuente Abierta (White Information)*, localizable en periódicos, publicaciones especializadas y demás bancos de datos; b) *Información Gris*, de más difícil acceso para el público no especializado, pero que se puede encontrar a través de fuentes de información privilegiada y por diferentes contactos; y, c) *La Información Oscura*, obtenida mediante mecanismos ilegales como el robo, el espionaje industrial o el

¹⁵⁶ TUSELL, Javier, “Prólogo. La época socialista entra en la Historia” en IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada: lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes socialistas de sus años de gobierno*, Madrid, Aguilar, 2003, p. 21.

¹⁵⁷ En cualquier caso, ha de afirmarse que en estos últimos años se han publicado una serie de aportaciones de notable interés que, en parte, han roto con la monotonía de décadas anteriores. Uno de los últimos ejemplos en: VEGA, Rubén, *Historia de la UGT. La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1996*, Madrid, Siglo XXI, 2011. Sexto volumen de la colección *Historia de la UGT*, dirigida por Santiago Castillo. En cualquier caso, véase lo ya apuntado en la *nota 155*.

¹⁵⁸ Hasta tal punto se ha llegado, que no faltaría quien con no poca imaginación –metafórica y literaria– llegara a comparar la *época socialista* y al propio González, con la mismísima Marilyn Monroe. ARMAS MARCELO, Juan José, *Los años en que fuimos Marilyn*, 3^a ed., Madrid, Espasa Calpe, 1995.

¹⁵⁹ CARR, Edward H., “El historiador y los hechos” en *¿Qué es la..., op.cit.*, p. 62.

¹⁶⁰ Véase el proyecto gubernamental francés al respecto en: www.intelligence-economique.gouv.fr. Y dentro de la citada web consúltese el texto –citaremos, exclusivamente, la versión en castellano– de uno de sus principales impulsores: JUILLET, Alain, “Principios y aplicación de la Inteligencia Económica”, 2 de junio de 2006.

pinchazo telefónico¹⁶¹. Trasladado a lo anterior a esta investigación, cabría indicar que la documentación relacionada con *información de fuente Abierta* y buena parte de la *información Gris*, estarían ya a disposición del historiador sin prácticamente problemas de acceso. En cambio, en relación a la denominada *información oscura*, que en nuestro caso habría de vincularse a lo discutido y a lo aprobado o no en los Consejos de Ministros, a las conspiraciones y secretismos que acompañaron las negociaciones de los grandes acuerdos económicos y sociales –el mejor ejemplo, de hecho, sería tanto la RET’84 y el AES– sin poder descartar plenamente otras acciones no legales de obtención de *información sensible o confidencial* y otras tantas cuestiones similares relacionadas con proyectos reservados/confidenciales del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo que finalmente no saldrían a la “luz pública” por diferentes motivos; como avanzábamos, probablemente, este tipo de papeles nunca lleguen a estar disponibles para la consulta más allá de lo que en su momento se filtró –o mejor dicho, se quiso filtrar– tanto por las restricciones jurídicas como por su más posible destrucción. Y pese a lo anterior, no sólo es posible esta historia del tiempo presente aquí propuesta, sino que sí un día se relevarán informaciones de este último tipo, es, prácticamente, seguro que no modificarían las principales líneas de interpretación de la época socialista, como tiempo tendremos de explicar y razonar en los apartados correspondientes.

Dicho esto, a pesar de todas las limitaciones y obstáculos –predecibles, imaginables y no imaginables– que se ha encontrado esta investigación, se presenta una abundante documentación inédita en la mayoría de los casos. Esta es la segunda importante novedad que queremos destacar. Todavía más, pues, a través de “inesperadas” vías se han accedido a *papeles*, que en su tiempo se consideraron, en no pocos casos, como materia confidencial y reservada, que, ciertamente, cuando se leen con atención pierden de forma parcial su “atractivo histórico”. Aunque más adelante se concretará dicha cuestión, el simple acceso hoy por día a los archivos históricos de la Fundación Francisco Largo Caballero, el Archivo de Historia del Trabajo-Fundación 1º de Mayo y en menor medida el archivo de la Fundación Pablo Iglesias –por tan sólo detenernos en los principales– ponen a disposición una documentación primaria lo suficientemente consistente para abordar tales cuestiones.

A ello se suma el acceso a importantes recursos hemerográficos ya en línea –aunque la mayor parte de la aquí empleada proceda de largas horas de estancia en hemerotecas, cuando ni siquiera era imaginable la expansión actual de la “redes”– que vienen a complementar y a ampliar la información de las fuentes primarias. El caso de las crónicas laborales de *El País* –dentro de la sección de *Economía, Trabajo y Sociedad*– entre otros medios, resulta el mejor ejemplo. Todo ello, por más, que tan sólo refleje mayoritariamente una realidad nacional, quedando desasistidos importantes procesos regionales. Día tras día, y gracias al “buen hacer del oficio” del periodista, junto con no pocas filtraciones interesadas, encontramos en aquellas crónicas uno de los relatos más vivos, más dinámicos, pero sobre todo mejor informados y útiles, de los que se pueden localizar, en no pocos casos, en las fuentes primarias, que tantas y tantas atenciones –y desvelos– suelen requerir por parte del historiador. Un tipo de periodismo ya prácticamente desaparecido, pero que hasta principios de los años noventa, tenía un lugar propio reservado en las principales cabeceras de la nación. Otro signo del lento declinar de la centralidad del movimiento obrero y, por ende, del mundo del trabajo.

Junto a una serie de testimonios orales obtenidos para esta investigación, también se han consultado no pocas bases de testimonios de las fundaciones antes referenciadas. Por último, en este trabajo se aporta un abundante *corpus estadístico* compuesto por centenares de gráficos, tablas, cuadros con valiosa –y en ocasiones *inédita*– información nacional e internacional sobre la economía, el mercado de trabajo, la conflictividad...

¹⁶¹ Jean-Marie Allin es una consultora de la empresa ZS2 Creative. Sus ‘tesis’ se pueden localizar en un documento especializado –aunque de fácil acceso– en, AGENCIA DE INNOVACIÓN DE BIZKAIA, *Modelos De vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva*, Bilbao, BIA, Berrikuntza = Agencia de Información, 2007, p. 22.

En tercer lugar, la apuesta por una historia social *desde abajo* y con *los de abajo* cobra aquí todo su sentido¹⁶². Como dijera Walter Benjamin nos corresponde “cepillar la historia a contrapelo”¹⁶³. Partimos de la premisa planteada en forma de pregunta que en 1981 ya se hiciera el propio Eric Hobsbawm. Al interrogarse sobre sí, “¿se ha detenido la marcha adelante del movimiento obrero?”, indicaba:

«[...] Si el movimiento obrero y socialista debe recuperar su espíritu, su dinamismo y su iniciativa histórica, nosotros, como marxistas, debemos hacer lo que sin duda Marx habría hecho: reconocer la nueva situación en la que nos encontramos; analizarla de manera realista y concreta; analizar las razones, históricas o de otro tipo, que han causado los fracasos y los éxitos del movimiento obrero, y formular no sólo lo que nos gustaría hacer, sino lo que se puede hacer [...]. No podemos permitirnos no hacerlo, ahora que la crisis ya está aquí»¹⁶⁴.

Años antes, concretamente en 1974, el propio Hobsbawm en su crítica de la “historia de la clase obrera «desde dentro del movimiento»” rechazaría ciertas visiones “esotéricas de la historia”. En un duro análisis a la creciente “esclerosis” de la historia del movimiento obrero y de la clase obrera —en donde apenas se distinguía donde comenzaba una y donde terminaba otra— se interroga por cuál era la labor de los historiadores. Allí mismo indicaba: “Recuperar un pasado que ha caído en el olvido, que inspira o que es memorable constituye una tarea apropiada para los historiadores”. A partir de donde aconsejaba “velar por la claridad de su enfoque, sea cual fuere”¹⁶⁵. He aquí una de las muchas enseñanzas que en las siguientes páginas se han tratado de llevar a la práctica.

Una visión guiada, además, por la también premisa de considerar a la historia social como un “proyecto social” en sí mismo, pero también como una “práctica científica”¹⁶⁶. Difícilmente se puede abordar un estudio de este tipo sin “una comprensión crítica de la realidad presente”, tal y como señalara Josep Fontana¹⁶⁷. Un examen de la realidad que, igualmente, trata de adentrarse en esa *historia total* descrita en su momento por Pierre Vilar, cuando hablaba de la

¹⁶² En este trabajo está más que presente la influencia de, THOMPSON, Edward P., “La historia desde abajo” en *Obra esencial Edward Palmer Thompson*, Barcelona, Crítica, 2001, p. 15, editado por Dorothy Thompson [“History from Below”, *The Times Literary Supplement*, 7 april, 1966]. Sobre esta misma cuestión nos hemos detenido en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delinquentes políticos: obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo (1971-1977)*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Ministerio de Presidencia, 2009, pp. 447-541.

¹⁶³ BENJAMIN, Walter, *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, México, Unidad Autónoma de la Ciudad de México / Itaca, 2008, pp. 41-42, VII *Tesis sobre la historia*.

¹⁶⁴ HOBSBAWM, Eric J., “¿Se ha detenido la marcha adelante del movimiento obrero?” en *Política para una...*, op.cit., p. 39. Véase también, GENOVESE, Eugene D. y GENOVESE Elizabeth F., “The Political Crisis of Social History: A Marxian Perspective” en *Social History Today and Tomorrow?* Dossier monográfico, *Journal of Social History*, vol. X, nº 2, (1976), pp. 205-220.

¹⁶⁵ HOBSBAWM, Eric, J., “¿Historia de la clase obrera e ideología” en *El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera*, Barcelona, Crítica, 1987 [1974], pp. 12, 14, 18 y 24, respectivamente [*Worlds of Labour. Further studies in the History of Labour*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1984]. En aquella misma recopilación de textos en su *Prefacio* declararía: «[M]ás que las organizaciones obreras y socialistas [...] lo que me interesa son sus raíces en la realidad de la clase trabajadora, incluyendo la realidad de los militantes de dicha clase». *Ibíd.*, p. 7.

¹⁶⁶ «[L]a historia es tanto una práctica social como científica, y lo que hacen los historiadores, así como su propia teoría de la disciplina, depende del lugar que ocupan en ese doble entramado, social y profesional». PROST, Antoine, “La profesión histórica” en *Doce lecciones sobre...*, op.cit., p. 64.

¹⁶⁷ FONTANA, Josep, *Historia: análisis del pasado y proyecto social*, Barcelona, Crítica, 1982, p. 11.

elaboración de “el *modelo histórico* eficiente, que no sólo toma en cuenta lo económico, sino lo psicosocial, las secuelas del pasado, las reacciones del presente...”¹⁶⁸.

Como en parte se ha avanzado, en “tiempos de mudanza” de la historiografía se inserta esta tesis doctoral. Tras tantos años anunciando la defunción de la clase obrera y del movimiento obrero –o como lo definiéramos en su momento: “la extraña derrota del movimiento obrero” como un triple proceso político, histórico y académico a la vez¹⁶⁹– y después de tantos *giros* y más *giros* –¿cuántos giros podrían contarse con exactitud a día de hoy?– en verdad la historia social –renovada o no, sociocultural o no¹⁷⁰– sigue más que presente, aunque se evite su cita y mucho más su defensa. Sin embargo, no existe un contexto intelectual propicio para tales empresas, por más que en el tiempo se fueran desinflando aquellas proclamas basadas en la *fe liberal* del *fin de la historia*, del *fin de las ideologías* o inclusive del *fin del trabajo*¹⁷¹.

Desde la publicación en 1979 de *La condition postmoderne* de Jean-François Lyotard, se ha venido anunciando, de forma incesante, el fin de la posibilidad de cualquier metanarrativa¹⁷². En su conversión en el paradigma dominante –con razonables parecidos a la propuesta de Alain Touraine que ya viéramos– mucho pesaría el profundo “pesimismo histórico” que Frederic Jameson observara en su examen del “marxismo occidental”¹⁷³. “La posmodernidad es lo que sucede cuando este adversario ha desaparecido sin que se haya obtenido ninguna victoria sobre él”, sentenciaría Perry Anderson en una de las más agudas críticas contra al posmodernismo. Añadiendo: “Lejos de haber desaparecido los grandes relatos, parecía que por primera vez en la historia del mundo estuviera cayendo bajo el dominio del más grandioso de todos: un solo relato universal de libertad y prosperidad”. De este modo, “[n]o podía haber nada más que capitalismo. Lo posmoderno era la condena de las ilusiones alternativas”¹⁷⁴.

¹⁶⁸ VILAR, Pierre, *Iniciación al vocabulario del análisis histórico*, Barcelona, Crítica, 1980, pp. 43-44 [*Initiation au vocabulaire de l'analyse historique*, s/l, s/d, 1970]. E igualmente, COHEN, Aron, CONGOST, Rosa y LUNA, Pablo L. (coords.), *Pierre Vilar: une histoire totale, une histoire en construction*, Paris, Syllepse, 2006 [*Pierre Vilar: una historia total, una historia en construcción*, Granada / Valencia, Universidad de Granada / Universidad de Valencia, 2006].

¹⁶⁹ GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora...*, op.cit., pp. 83-116. En esta misma línea: SILVER, Beverly J., *Fuerzas de trabajo...*, op.cit..

¹⁷⁰ Textos clarificadores del *actual panorama*: PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer historia Social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, n° 60, (2008), pp. 59-90; y, PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coords.), *Manuel Tuñón de...*, op.cit., pp. 227-248. En cualquier caso, y como ya se ha remarcado, se volverá en profundidad sobre tal cuestión en el apartado “3. A vueltas con la historia social: debates, controversias y dilemas del historiador social hoy en España”.

¹⁷¹ Véase aquí lo ya apuntado en la *nota* 86.

¹⁷² LYOTARD, Jean-François, *Le condition postmoderne: rapport sur le savoir*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979 [*La condición postmoderna: Informe sobre el saber*, Madrid, Cátedra, 1984]. Al respecto, HUYSEN, Andreas (ed.), *El modernismo después de la posmodernidad*, Barcelona, Gedisa, 2011 [“Modernism after Postmodernism”, *New German Critique*, n° 99, (2006)].

¹⁷³ JAMESON, Fredric, “Postmodernism, or *The Cultural Logic of Late Capitalism*”, *New Left Review*, vol. I, n° 146, (1984), pp. 53-92. Años más tarde se publicaría un libro de igual título [Durham, Duke University Press, 1991] traducido prontamente al castellano [*El podermodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Barcelona, Paidós, 1991].

¹⁷⁴ ANDERSON, Perry, *Los orígenes de la posmodernidad*, Barcelona, Anagrama, 2000, pp. 119, 48 y 66, respectivamente [*The Origins of Postmodernity*, London, Verso, 1998].

Tal ha sido la *avalancha del post* que a la hora de dotarse de las herramientas necesarias para afrontar un proyecto de este tipo, se hace necesario volver a traer a colación a Michael Parenti cuando hablaba de lo que entendía como la *historia ortodoxa*:

«El peligro de un sesgo disidente probablemente no es tan grande como el que plantea la historia convencional, porque los lectores que acceden a un punto de vista disidente después de haber estado a dieta de los mitos de la corriente principal, estarán alertados de lo que es diferente y cuestionable»¹⁷⁵.

A partir de los anteriores antecedentes y contextos, optaríamos, pues, por una historia social totalizante, que además tuviera un carácter interdisciplinar. Es decir, nuestra investigación se apoya, al mismo tiempo, en la economía, en el derecho del trabajo, en la sociología de la juventud así como en la sociología del trabajo... de cara a configurar la tan deseada visión global sobre la “época socialista”.

Por este camino, y a pesar de la crítica generalizada contra la historia política, esta aquí se presenta desde un *enfoque renovado*, que no empieza ni concluye en los propios partidos políticos y/o organizaciones sindicales, sus presupuestos programáticos e ideológicos; sino que se interroga por sus identidades y culturas políticas así como por sus propias funciones normativas¹⁷⁶. Elementos que rompen con la tendencia a historiar una organización política o sindical como un fin en sí mismo. A ello se le acompaña también de una “desacreditada” historia económica, que va mucho más allá de interpretar el régimen económico imperante como una realidad natural dada. De esta forma, se va un paso más allá en relación al enfoque dominante de la historia económica, pero también de las lecturas predominantes de las ciencias económicas. Un *ángulo* teórico a la par que metodológico –y aquí entra en juego nuestro tercer y último axioma investigador– que se sustenta, en gran medida, en una lectura marxista de la economía, y que parte de una premisa fundamental explicada magistralmente en su día por Diego Guerrero de la siguiente forma:

«La explotación es un resultado normal e inevitable de la *acumulación de capital*, es decir, del hecho de que la economía del país adopte, bajo un revestimiento político dispar, el mismo régimen económico dominado por el capital y el beneficio»¹⁷⁷.

Desde esta suma de enfoques, axiomas, premisas, caminos de aproximación... se avanza también en el examen del estudio de las “élites” económicas y político tecnocráticas¹⁷⁸. Se pretende, por ende, reconstruir una “cartografía de las estructuras del poder”, tal y como las ha concebido Mario Vargas Llosa. Una *cartografía* que no deja de responder al interrogante planteado hace ya tiempo por Göran Therborn:

¹⁷⁵ PARENTI, Michael, *La historia como...*, op.cit., p. 16.

¹⁷⁶ En este sentido, un reciente conjunto de trabajos han venido a resituar dicha cuestión en la *agenda investigadora* de forma notable: PÉREZ LEDESMA, Manuel y SIERRA, María (eds.), *Culturas políticas: teoría e historia*, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010.

¹⁷⁷ GUERRERO, Diego, *La explotación...*, op.cit., p. 60 [se sigue aquí la versión electrónica consultable en, www.ucm.es]. En otro texto complementaría dicha visión: «Ante todo, la explotación no es una fenómeno moral ni su análisis puede reducirse a una crítica política; es una categoría dentro de un sistema teórico y tiene un significado *preciso* que hay que describir con la exactitud de un científico y contrastar con la realidad como hacen los científicos. La explotación del trabajo por el capital se produce porque dominan determinadas *condiciones sociales* que hacen posible que el conjunto de los trabajadores [...] *trabaje demasiado*». Id., *Un resumen completo de...*, op.cit., p. 18.

¹⁷⁸ Una aportación teórica de relieve al respecto en: PRO RUIZ, Juan, “Sujetos con poder en la España contemporánea” en RIVERA, Antonio, ORTIZ DE ORRUÑO, José M^a y UGARTE, Javier (eds.), *Movimientos sociales en...*, op.cit., pp. 65-81; por lo demás, y para el tiempo en que nos movemos, véase el retrato de, ORTÍ, Alfonso, “Transición postfranquista a la Monarquía parlamentaria y relaciones de clase: del desencanto programado a la socialtecnocracia transnacional”, *Política y Sociedad*, n° 2, (1989), pp. 7-20. Una visión complementaria: MARTÍNEZ ALIER, José y ROSA JUSMET, Jordi, “Economía política del corporativismo en el Estado español: del franquismo al posfranquismo”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 4, (1988), pp. 25-62.

«¿Cómo se las ha arreglado la diminuta clase burguesa, y la aún más pequeña fracción dirigente de la misma, para llegar a dominar con métodos democráticos, caracterizados por la libertad legal para crear opinión y por el sufragio universal e igual para todos?»¹⁷⁹.

Al mismo tiempo –y aquí entra nuestra propuesta de historia social *desde abajo* y con *los de abajo*– nos detendremos también en los citados costes sociales y humanos de la modernización socialista en la clase trabajadora. Su centralidad y protagonismo son innegables en esta investigación. «La clase la definen los hombres mientras viven su propia historia, y al fin y al cabo ésta es su única definición»¹⁸⁰, señalaría Edward P. Thompson en su *Prefacio a La formación de la clase obrera en Inglaterra*. No se oculta aquí, tampoco, que uno de nuestros objetivos es *resituar* a la “clase” en el primer lugar del relato –frente a determinadas llamadas a *releer* dicha problemática en términos de “identidad”¹⁸¹–en línea con las propuestas de Joan Gangster¹⁸², John H. Goldthorpe¹⁸³ o el propio Göran Therborn¹⁸⁴, antes que con ciertas llamadas al diálogo difícilmente asumible –de entrada– como la propuesta por Geoff Eley y Keith Nield¹⁸⁵.

¹⁷⁹ THERBORN, Göran, *¿Cómo domina la...*, *op.cit.*, p. 2. Su conclusión al interrogante propuesto venía a resolverse de la siguiente forma: «¿Cómo domina, entonces, la clase dominante? Fundamentalmente reproduciendo las relaciones económicas, políticas e ideológicas de su dominación. Esta se ejerce a través del poder del Estado, es decir, mediante las intervenciones o la política del Estado y sus correspondientes efectos en las posiciones de la clase dominante, dentro del campo de las relaciones de producción, en el aparato del Estado y en el sistema ideológico. El carácter de clase del poder estatal viene determinado, consiguientemente, por los efectos de las medidas del Estado sobre las posiciones de clase en las tres esferas mencionadas». *Ibíd.*, p. 193.

¹⁸⁰ THOMPSON, Edward P., “Prefacio” en *Obra esencial Edward...*, *op.cit.* p. 15 [correspondiente al “Preface” en *The Essential E.P. Thompson*, New York, The New Press, 2001; y a su vez, “Prefacio” en *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, II vols., Barcelona, Crítica, 1989, p. XV (1ª ed., en castellano en, Barcelona, Laia, 1977; y, traducción de, *The Making of the English Working Class*, New York, Vintage Books, 1963)]. Asimismo este trabajo es deudor de la definición del autor británico en cuanto a la *clase*: «Por clase entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares y aparentemente desconectados en lo que se refiere tanto a la materia prima de la experiencia como a la conciencia. Y subrayo que se trata de un fenómeno *histórico*. No veo la clase como una ‘estructura’, ni siquiera como una ‘categoría’, sino como algo que tiene lugar de hecho (y se puede demostrar que ha ocurrido) en las relaciones humanas». *Ibíd.* [*cursiva* en el texto original]. Del mismo autor, *id.* “Algunas observaciones sobre la clase y la «falsa conciencia»” en *Dos décadas de Historia Social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 10, (1991), pp. 27-32.

¹⁸¹ Una visión siempre constructiva en: FORCADELL, Carlos, “La historia social, de la «clase» a la «identidad»” en HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y LANGA, Alicia (eds.), *Sobre la historia actual. Entre política y cultura*, Madrid, Abada, 2005, pp. 16-35.

¹⁸² SANGSTER, Joan, “Historia Social” en *Encuesta: ¿qué entendemos hoy por Historia Social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp. 213-224. De la misma autora, *Dreams of equality: women on the Canadian left, 1920-1950*, Toronto, McClelland & Stewart, 1989.

¹⁸³ GOLDTHORPE, John H., “De vuelta a clase y el estatus. Por qué debe reivindicarse una perspectiva sociológica de la desigualdad social”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 137, (2012), pp. 43-58. En similar línea interpretativa, OLIN WRIGHT, Erik, “Comprender la clase: hacia un planteamiento analítico integrado”, *New Left Review*, nº 60, (2010), pp. 98-112.

¹⁸⁴ THERBORN, Göran, “Global Inequality: The Return of Class”, *Global Dialogue*, vol. II, nº 2, (2011), pp. 3-5 [en castellano, “Desigualdad Global: el retorno de la clase”, *Global Dialogue*, vol. II, nº 2, (2011), pp. 3-5].

¹⁸⁵ ELEY, Geoff y NIELD, Keith, *The future of the class in history: what's left of the social?* Michigan, University of Michigan Press, 2007 [*El futuro de la clase en la historia: ¿qué queda de lo social?* Valencia, Publicacions Universitat de València, 2010]. A complementar lo anterior con, entre otros títulos, REGINI, Marino (ed.), *The future of Labour Movements*, Newbury Park (SA), Sage, 1992; BERLANSTEIN, Lenard R. (ed.), *Rethinking Labor History. Essays on discourse and class analysis*, Urbana, University of Illinois Press, 1993; JOYCE, Patrick y HALL, John R., *Reworking class*, Ithaca, Cornell University Press, 1997; REVELLI, Marco, *Más allá del siglo XX: las políticas, las ideologías y*

Una apuesta por una historia social que también tiene por epicentro el estudio de la conflictividad obrera –y política, por extensión–. Un relato de los hechos que va mucho más allá de las cifras y datos sobre jornadas y horas de trabajo perdidas o de trabajadores implicados. Nos internaremos en las propias dinámicas del conflicto social bajo los ejecutivos socialistas. “Los hombres son el objeto único de la historia”, diría Lucien Febvre en sus *Combates por la historia*¹⁸⁶. Aquí no es tan sólo la clase trabajadora la que protagoniza el relato, sino también están presentes los propios *trabajadores* –en la propia concepción que les otorgaría Eric Hobsbawm¹⁸⁷–. O dicho de otra forma, nos interesa sobremanera examinar el papel jugado por los “peatones de la historia”, de los que hablaba insistentemente Manuel Vázquez Montalbán.

En cuarto término, los resultados de esta tesis doctoral invitan a reflexionar en torno a un conjunto de “imágenes-fuerza colectivas”, que han impregnado la *sabiduría convencional* en torno a este tiempo¹⁸⁸. De esta forma, en primer lugar, se presenta una razonada crítica histórica en torno a la tesis del carácter socialdemócrata o progresista de los gobiernos socialistas en estos años, a través de su proyecto de modernización. Es decir, se cuestiona el paradigma de la “modernización”, tanto en su formación teórica como en su proyección práctica¹⁸⁹. No sólo, frente a la potente *idea-fuerza* de la “única política posible” –en donde la economía sería leída como una ciencia exacta antes que como una cuestión de prioridades políticas¹⁹⁰– con la que tanto desde el Gobierno como desde el Partido presentarían y defenderían en todo momento su política económica; lo que se viene a proyectar esta investigación es la *opción* por una política de corte liberal-progresista en el proceso de “reestructuración del modelo capitalista español”¹⁹¹. No obstante, aquí no se pretende ofrecer ninguna visión alternativa, sino aportar una lectura fundamentada en datos y hechos, a un debate en el que rara vez han participado los historiadores. En segundo lugar, lo anterior conlleva un cuestionamiento de las grandes narraciones dadas, y que no necesariamente deben de proceder de los departamentos de historia contemporánea. A saber, frente al denominado y consabido *relato canónico de la transición* y de la *consolidación de la democracia* (de mercado) cada vez más cuestionado, se ofrece también una lectura que invita a pensar en otros *enfoques* sobre hechos fundamentales de “nuestro presente vivido”.

Vamos concluyendo, con la que se puede considerar como la quinta novedad de esta investigación. La defensa de la centralidad de las relaciones capital-trabajo, se retoma aquí desde las posiciones ya enunciadas. Pese a la gran paradoja histórica que precisamente las reformas laborales, de carácter flexibilizador-liberalizador, van a llevar a una progresiva y continuada pérdida de esta misma centralidad en las nuevas lecturas y relatos que se van a

las asechanzas del trabajo, Madrid, Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo, 2002 [*Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro*, Torino, Einaudi, 2001].

¹⁸⁶ FEBVRE, Lucien, *Combates por la historia*, 3ª ed., Barcelona, Ariel, 1974 [*Combats pour l'histoire*, Paris, Armand Colin, 1965].

¹⁸⁷ HOBSBAWM, Eric, J., ¿“Historia de la clase obrera e ideología” en *El mundo del...*, op.cit..

¹⁸⁸ El concepto ‘sabiduría convencional’ se toma prestado de, NAVARRO, Vicenç, “Desigualdad, crisis y competitividad. Las insuficiencias en la sabiduría convencional sobre las causas de la crisis y el error de sus soluciones”, *Gaceta Sindical: reflexión y debate*, nº 17, (2011), pp. 127-133.

¹⁸⁹ Aquí por paradigma damos por válida la definición que en su día ofreciera el Colectivo IOE: «La construcción de un paradigma se produce cuando una determinada conceptualización llega a convertirse en paradigma porque condensa una serie de elementos clave de la realidad social; estudiando su génesis podemos averiguar a qué problemas viene a dar respuesta y a qué intereses favorece». COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de], “La ideología de la modernización o la parábola del asno y la zanahoria”, *Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada*, nº 88, (1992), pp. 77-86.

¹⁹⁰ Consúltase aquí: CABO, José Mª, *La economía como ideología: mitos, fantasías y creencias de la ‘ciencia’ económica*, Hondarribia, Hiru, 2004.

¹⁹¹ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 31-92.

ofrecer; y, sin embargo, sin tener presente dicho factor explicativo no se puede interpretar, en términos históricos, el mismo cambio social y generacional en su día explicado por James Petras. Esta *defensa*, además, se encuentra apoyada por la presentación de nuestro particular modelo investigador en relación a la RET'84. Un modelo que se interroga por las conexiones de lo que sucede a la vez en los despachos, en las ruedas de prensa, en la calle, en los centros de trabajo. Una *visión global eficiente*, que creemos que será capaz de reflejar la importancia histórica y social de aquella reforma laboral, que una vez publicada en el B.O.E. llegaría a transformar la “cuestión salarial” como en su día explicara sobresalientemente Robert Castel¹⁹².

«Contra el optimismo no hay vacunas».

Mario BENEDETTI

Después del trance que acompaña a la conclusión de toda tesis doctoral, lo primero que se viene a la cabeza son aquellos “imprescindibles” de los que hablara Bertolt Brecht. Aquellos que siempre han estado a tu lado. No suelen ser muchos. Pero ahí han estado ayudando, comprendiendo pero sobre todo aguantando tantas horas como ilusiones y desilusiones. Vaya, pues, nuestro primer agradecimiento, primero, a mi amiga y mi compañera Elisa. Sin ella, su compañía, su permanente apoyo y sin su tozudez no estaríamos aquí escribiendo estas líneas.

Ahora bien, desde el principio hasta el final, sin la maestría, las lecciones –de la historia así como de la vida– y paciencia de mi director de tesis doctoral –Julio Aróstegui– no habría tenido lugar esta tesis. Director, pero también amigo, que no sólo aceptó llevarme la tesis la primera vez hablé con él, sino con el que he compartido proyectos editoriales e investigadores, que me han ayudado a formarme tanto como historiador como persona. Asimismo me ayudaría a conseguir una beca FPU¹⁹³ –posteriormente reconvertida en un contrato (precario)– que me permitiría no sólo desarrollar esta investigación, sino disfrutar de un tiempo del que guardó valiosos recuerdos.

En estos casi dos últimos años en los que hemos estado redactando esta investigación, a caballo con otros proyectos y compromisos profesionales, he contado con el apoyo decidido de otros tantos “imprescindibles”: Francisco Pelayo, Juan Avilés, Jaime Ruiz, Francisco Erice, Xavier Domènech, José Babiano, Javier Tébar... Un tiempo en el que también he contado con la ayuda de tantos colegas del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid: Antonio Moreno Juste, José Sánchez Jiménez, Esperanza Yllán Calderón, Elena Hernández Sandoica, Luis Enrique Otero Carvajal, Ángel Viñas, Jesús Martínez Martín... Otros tantos historiadores también han estado ahí: Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Saborido, Juan Sisinio Pérez Garzón, Francisco Espinosa Maestre, Francisco Moreno, Pedro Ruiz Torres, Manel Risques, Carmen García García, David Ginard, Iñigo Carrera, Rubén Vega, José Gómez Allén, Mirta Núñez Díaz-Balart, Matilde Eiroa, María Ángeles Egido, Alexandre Froidevaux, Julián Sanz Hoya, Sandra Souto, Manuel Álvaro, Francisco Ferrándiz, Gutmaro Gómez Bravo, Ferrán Archilés...

En paralelo, nuestros agradecimientos estarían incompletos sin recordar a amigos y profesores fuera del campo del conocimiento historiográfico, que dieron sentido a este proyecto. Ahí están, por ejemplo, Antonio Baylos, Fernando Valdés Dal-Ré, Ángel Domínguez, Jesús Lahera, Mario Ackerman... Todos ellos desde el Derecho del Trabajo. Desde el campo de la sociología, ahí ha estado Pablo López Calle y otros colegas. En el campo económico, Diego Guerrero sin duda ha sido un soporte intelectual valioso en extremo. Antonio García

¹⁹² CASTEL, Robert, *Las metamorfosis de...*, *op.cit.*.

¹⁹³ Beca de Postgrado para la Formación de Profesorado Universitario [FPU] 2004/2006 [Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Convocatoria 2003 (B.O.E. 29/VII/2003). Referencia: AP2003-0024; Personal Investigador en formación con contrato para personal docente o investigador de universidades [1 de julio de 2006 / 31 de enero de 2008].

Santesmases, desde el lado de la filosofía histórica pero también desde el sindical. Otro tanto, debe decirse de Armando Caro Figueroa, asesor de la UGT en España, igualmente asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en su momento Ministro de Trabajo de Argentina (1993-1997).

Un listado de agradecimientos en el que necesariamente ha de citarse a un conjunto de “compañeros” sindicalistas, que nos hicieron comprender el verdadero alcance histórico y social de esta investigación: Agustín Moreno, Salce Elvira, Cecilio Silvera...; también estuvieron ahí los “compañeros” de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otros, Horario Meguira y Guillermo Gianibelli...

Fuera del mundo académico o sindical, no nos resistimos a recordar a una serie de amigos que no sólo nos han apoyado, sino que tuvieron el tiempo y valor de leer esta investigación y otros tantos trabajos: Paco Porras, Francisco Javier Martínez, Paloma Vázquez, Pablo González Velasco, Sonia Caballero... Amigos, profesores, compañeros, colegas... a los que habría que sumar otros no pocos, que aun no apareciendo aquí bien saben ellos que están más que presentes en estas líneas.

Miro atrás, y hago un ejercicio de memoria personal, y visualizo a tanta y tantos personas que se han entrecruzado en este tiempo, y que sin su ayuda tampoco estaríamos aquí. De forma destacada he de mencionar a Nuria Franco, Ester Ramos y Jesús Rodríguez, de la Fundación Francisco Largo Caballero. Un archivo que no sólo me brindó documentación, sino una “segunda casa” durante los largos meses que allí pasé, y a los que en la menor ocasión no me resisto a pasar. Otro tanto se puede decir de los amigos de la Fundación 1º de Mayo. Igualmente me gustaría hacer extensivo estos agradecimientos a otros tantos archiveros, pero sobre todo a los bibliotecarios de la Universidad Complutense de Madrid, que soportaron con entera dignidad mis múltiples peticiones de libros, artículos... Y cómo no, a María José Sanz, Secretaria del Departamento de Historia Contemporánea de la UCM siempre tan atenta y capaz de resolver los interminables embrollos burocráticos.

Un capítulo de agradecimientos pero a la vez de recuerdos que tiene un final tan inesperado como doloroso. Me refiero a la desaparición de Juan Gálvez Moreno. Mi padre, quien no podrá ver el final de esta tesis doctoral. Su vida, su historia, sus peripecias políticas, sindicales y carcelarias es una de esas miles de historias anónimas, y todavía hoy clandestinas, sin las que este libro, a buen seguro, no habría tenido lugar. Todo historiador tiene una fuente concreta de inspiración. He aquí la nuestra.

Madrid, septiembre 2012

I. Herramientas y estrategias de investigación

2. Herramientas y estrategias de investigación: caminos de aproximación, estado de la cuestión y fuentes

«No se trata de sentar los principios de una nueva interpretación que explique todas las verdades –las respuestas que deben reemplazar a las viejas son mucho más complejas que la simple negación de estas–, sino de agudizar el sentido crítico ante los hechos del pasado para afinar las herramientas intelectuales que nos han de ayudar a aclararnos en un presente tan confuso como este en que vivimos».

Josep FONTANA, *Por el bien del imperio*¹.

«El historiador ha sido por lo común educado en un universo de presuposiciones dirigidas a obviar siempre el presente como ‘momento histórico’ en sí mismo. Cada historia tiene su historiografía y el discurso histórico de la historiografía occidental en los dos últimos siglos se ha tenido siempre por un discurso *sobre el pasado* y no sobre el *presente* [...]. La función de *historiar* no está ligada por definición al pasado, sino que, por ser una forma de análisis social de la temporalidad [...] ha de ocuparse de esa temporalidad entera del hombre, de todo tiempo *posible* del hombre».

Julio ARÓSTEGUI, *La historia vivida*².

Las siguientes páginas están dedicadas a la presentación de las bases teóricas y metodológicas, así como de las principales fuentes empleadas, en esta tesis doctoral. A saber, nuestro aparato científico. Un epígrafe dividido en tres grandes apartados. En primer lugar, se recorrerán las principales preguntas con sus correspondientes hipótesis de trabajo, que dan sentido y estructuran el presente trabajo. En segundo lugar, se lleva a cabo un estado de la cuestión, que va más allá de una mera recopilación bibliográfica para internarse por las principales líneas de investigación y debates, que han marcado el ritmo de una incompleta agenda interdisciplinar sobre los gobiernos socialistas. Ya en una tercera parte nos detendremos en las diferentes fuentes empleadas –primarias, secundarias... – prestando una especial atención a los obstáculos y las problemáticas –tanto legales como de otro tipo de signo– de cara a examinar la historia de nuestro tiempo presente. Un apartado en donde se incidirá en las posibilidades y limitaciones de las fuentes de tipo estadístico para este tipo de investigaciones.

Un capítulo, que a partir de las consideraciones de todo orden expuestas previamente en la *Presentación*, fundamenta los criterios científicos de nuestra investigación. A ello se sumará el siguiente apartado 3, *A vueltas con la historia social: debates, controversias y dilemas del historiador social hoy en España*, con el que se complementará este primer epígrafe.

2.1. Nuestros caminos de aproximación: interrogantes e hipótesis de trabajo

Modernización socialista y reforma laboral, presenta un recorrido por la historia del socialismo contemporáneo a lo largo de veinte años (1972-1982), incluyéndose su paso por el Gobierno de la nación hasta el año 1992. El eje que guía toda la investigación gira en torno a la centralidad del mundo del trabajo. Y a partir de él se evalúan los costes políticos, económicos, laborales, culturales... que conllevaría el accionar de los ejecutivos socialistas. Con el objetivo de proyectar una visión global sobre este periodo en base a una historia social totalizante, se

¹ FONTANA, Josep, *Por el bien del imperio...*, *op.cit.*, p. 24.

² ARÓSTEGUI, Julio, *La historia vivida...*, *op.cit.*, p. 106.

abordará dicha realidad desde una perspectiva interdisciplinar, que recorre a su vez este tiempo de nuestra reciente contemporaneidad desde lo macrohistórico a lo microhistórico³.

Toda una serie de pasos investigadores consecutivos e interrelacionados nos llevarán, primero, a explicar detenidamente la particular transición del socialismo español así como la posterior elaboración de su estrategia de conquista del poder político. Un recorrido que se inicia un domingo 13 de agosto de 1972, y que nos abrirá la posibilidad de determinar adecuadamente qué tipo de proyecto político pero también de sociedad diseñarían los propios socialistas, de cara a afrontar la *salida* a la crítica situación económica como política existente a principios de los años ochenta. Ya en una segunda parte que arranca un viernes 3 diciembre de 1982 –tras la victoria electoral de octubre del mismo año y la configuración del primer gobierno socialista– la misma nos conducirá a delimitar las grandes líneas sobre las que se sustentaría la estrategia de la modernización socialista, así como sus principales resultados de todo tipo y orden.

Si hasta aquí la radiografía que se presenta nos ayudará a visualizar las grandes realidades históricas que se desarrollan entre 1982 a 1992, a continuación nos detendremos en las *interioridades* de tal proceso histórico. Desde un enfoque microhistórico, a partir de nuestro estudio de caso, analizaremos, en términos históricos, las negociaciones y la elaboración de la reforma del Estatuto de los Trabajadores y del Acuerdo Económico y Social, respectivamente. Un enfoque, que nos permitirá adentrarnos, desde un privilegiado ángulo, en las tensiones subyacentes de aquel intenso periodo reformista. Un ángulo de examen en el que día tras día desde mayo de 1983 a diciembre de 1984, se examinarán las contradicciones y dilemas que tuvieron que afrontar los ejecutivos socialistas, en relación a la puesta en marcha de su proyecto de modernización y de forma específica la reforma laboral del citado año 1984. En un contexto de fuerte conflictividad, que trastocaría seriamente la inicial *agenda política reformista* de los socialistas, en suma, se ofrece un estudio histórico cargado de complejidades, dificultades pero sobre todo de incertidumbres, muy lejos, por tanto, de las *imágenes-fuerza* que todavía pesan sobre estos mismos años.

A partir de estos *caminos de aproximación* se fundamenta la presente tesis doctoral. Una investigación que tiene por objeto dar cumplidas respuestas a una serie de interrogantes que se nos aparecen como fundamentales, para a su vez explicar las dinámicas históricas que comporta todo proceso de cambio político, social, económico y laboral.

Con el empleo de “la década de la consolidación de la democracia” –frente a la conceptualización de signo político de la “década del cambio”⁴– nos situamos en las dimensiones históricas de un tiempo que transcurre, principalmente, entre 1982 y 1992. Un término que nos avoca a un periodo marcado por la aceleración de los tiempos históricos, pero sobre todo determinado por un conjunto de rupturas en todos los órdenes centrales de la sociedad.

Son los interrogantes y las hipótesis de trabajo las que determinan las elecciones metodológicas y los enfoques. Este es nuestro caso. Difícilmente, se puede concebir una investigación desde presupuestos contrarios. Tal y como se ha avanzado en la *Introducción* y como se abordará en el Capítulo 3, este trabajo parte de unos presupuestos teóricos y metodológicos definidos y concretos. Desde avanzar en la práctica –puestas hace tiempo las bases teóricas– de una *historia del tiempo vivido*, pasando por la defensa de una historia social renovada, así como por la combinación de diferentes enfoques interdisciplinares –jurídico, económico, sociológico, político...– se pretende, en suma, resituarse al mundo del trabajo, a la

³ Útiles en este sentido resultan las aportaciones de, GARCÍA GARCÍA, José Tomás, “Revisión del debate teórico-metodológico sobre la integración de las dimensiones micro y macro en investigación social”, *Sistema*, nº 223, (2011), pp. 77-97.

⁴ Véase lo apuntado en *Presentación*, nota 65.

clase y al conflicto en la primera línea de una agenda investigadora, generalmente, ajena a tales preocupaciones.

Ahora bien, existe una gran cuestión subyacente que recorre y estructura toda la investigación, y que, por tanto, ha de explicitarse en un primer término. ¿Qué tipo de política económica llevarían a cabo los ejecutivos socialistas? Estamos ante uno de los grandes debates de este tiempo, cuyas posibles respuestas han situado tal política como de corte clásico-liberal, pasando por la caracterización de socialdemócrata –sin excluir su conceptualización como *progresista*– hasta aquellas que han incidido el carácter socio-liberal de las mismas. No es ni mucho menos baladí la anterior cuestión, pues en su función de su posible respuesta se modifica radicalmente la perspectiva histórica global adoptada. Un interrogante tanto más necesario ante la justificación *a priori* y *a posteriori* por parte de los propios dirigentes y técnicos socialistas, de que tan sólo existió una “única política posible”. Precisamente, nuestras preguntas, nuestras hipótesis de trabajo así como nuestros caminos de aproximación, van siempre, en paralelo, a ofrecer un conjunto de respuestas a tal axioma político-técnico, y a partir de ahí explicar sus propias consecuencias históricas.

Delimitadas previamente las fechas cronológicas extremas así como los actores fundamentales del presente estudio, corresponde, por tanto, explicitar nuestras hipótesis de trabajo.

2.1.1. 1ª Hipótesis de trabajo. La conquista del poder político del socialismo español: la misión histórica del PSOE (1972-1982)

A partir de nuestro interrogante inicial formulado –¿*Qué papel histórico decidió jugar el PSOE al frente del Gobierno en el proceso de salida a la crisis económica procedente de los setenta?*– el mismo obligadamente nos conduce a explorar los antecedentes previos de la llegada al Ejecutivo por parte de los socialistas. En esta tarea, y bajo lo que denominaremos como las *contradicciones del socialismo*, surgen otras tantas: ¿Cómo un pequeño partido de izquierdas marxista radical, prácticamente desaparecido durante la dictadura franquista y sin base social ni militante, en menos de una década no sólo se convertiría en una potente como engrasada maquinaria electoral, sino que arrasaría en las elecciones de octubre de 1982? ¿Cuál fue su evolución política, ideológica, programática, discursiva...? ¿A qué tuvo que renunciar y qué cesiones tuvo que realizar? ¿Qué tipo de partido era el propio PSOE en 1982? ¿Marxista? ¿Socialdemócrata? ¿Reformista? O directamente, ¿liberal? ¿Cómo y de qué manera afectó su concepción político económica en la elaboración de su estrategia de conquista del poder político?

Para dar cumplida respuesta a dicha hipótesis de trabajo se ha establecido la siguiente estrategia investigadora:

1.- Análisis de la evolución política, programática, ideológica, con un especial acento en la nueva *cultura política* que se conforma en su interior, a lo largo de la segunda mitad de la década de los setenta al calor de una serie de acontecimientos históricos claves, que no comienzan ni finalizan en los meros procesos electorales. Se abordará, por tanto, el estudio del Partido en su sociedad –en pleno proceso de cambio político-social en la transición postfranquista– pero a su vez en su contexto internacional –la evolución de los denominados partidos socialistas del Sur de Europa–.

2.- Por otro lado, nos internaremos por la propia concepción –en forma de auto-representación político/propagandística– con la que el PSOE –y su sindicato hermano, la UGT, en suma la “familia socialista”– se presentarían ante la sociedad, su potencial electorado y su propia base militante, que como tiempo habrá de examinar se ampliará gradualmente desde la centralidad obrerista a la llamada *nueva clase media*. Aquí el estudio del peso de la “memoria histórica socialista” transmitida o vivida se convertirá en un poderoso aliado –de recuperación militante y de crecimiento electoral– en el progresivo paso de lo político a lo electoral, en relación a las prioridades estratégicas que se van constantemente redefiniendo.

3.- La transformación político-discursiva –antes que estrictamente ideológica– así como la construcción de una cada vez más perfilada estrategia de conquista del poder político, constituye nuestro tercer punto doble de sujeción. No se pretende aquí –ni mucho menos– llevar a cabo un análisis en torno al “lenguaje socialista”, sino examinar la citada *transformación* en relación a una estrategia global de conquista del poder político. Por lo demás, como se tratará de evidenciar la metamorfosis del PSOE no sólo constituye un fenómeno de análisis estrictamente político, en base a lo que se aprueba o deja de aprobar en sus Congresos. Tampoco –mantendremos– el punto de inflexión definitivo lo constituirá la *ruptura* con el marxismo en el XXVIII Congreso extraordinario de septiembre de 1979. A partir de lo anterior, se obtienen evidencias –más o menos fundamentadas– pero, sin embargo, no se puede llegar a explicar correctamente el papel histórico que el PSOE decidiría jugar una vez en el Ejecutivo.

4.- Las posibles respuestas para interpretar esta hipótesis de trabajo se encuentran, principal aunque no únicamente, en el examen histórico que los socialistas realizan de la reciente evolución del país. Todo ello bajo un claro prisma de clase –y no precisamente *obrera*– y una singular concepción de la conquista del poder político y del propio Estado. De ahí nacerá lo que los propios socialistas denominarían su “misión histórica”, guiada por un análisis determinista de la realidad y sustentada en base a una serie de etapas históricas sucesivas de desarrollo económico, que se han de ir *quemando* de cara a alcanzar una futura como utópica sociedad socialista. Una *próxima* como *deseada* “sociedad socialista” que permitiría, en palabras de los propios socialistas, alcanzar la *felicidad de todos los hombres*.

Una *misión histórica* que diseñada por una serie de intelectuales socialistas –con José María Maravall al frente– se sustentaría en el siguiente “análisis científico-histórico”: en tanto la *derecha política y económica* no ha querido y/o no ha podido llevar a cabo la *necesaria* como *inevitable* “revolución burguesa” de la nación, los socialistas no tendrán más remedio que asumir tal *misión* ante tal fracaso histórico. De ahí surgiría la definitiva reformulación programática socialista, consistente en que el socialismo se transformaría, a su pesar, en el sujeto histórico encargado de la modernización y democratización del país. Así queda concretada su *responsabilidad histórica* ante la nación. Es decir, el análisis de su moderación ideológica sumada a no pequeñas dosis de pragmatismo –como se evidenciaría en el propio programa electoral de 1982, *Por el cambio* y en otra serie de documentos generalmente desconocidos como la propia ponencia económica del XXIX Congreso socialista de 1981– se constituyen en las mejores bases para avanzar en una posible respuesta. De ahí a la victoria electoral del ochenta y dos y la constitución de un Gobierno de marcada orientación técnica liberal antes que socialdemócrata, nos posibilitarán acercarnos a las causas y factores para responder a los interrogantes formulados líneas atrás.

Los anteriores presupuestos se desarrollan en el II Epígrafe –La conquista del poder político del socialismo español: la *misión histórica* del PSOE (1982-1982)–. Y en concreto a través del Capítulo 4 –La metamorfosis del PSOE: las contradicciones del *socialismo modernizador* (1982-1992)– y de forma detallada en el capítulo 5 –Gabinetes «tecnocráticos» y «liberales» para los nuevos tiempos– en donde se desgranarán todas las etapas, los principales debates de la época, pero sobre todo la acelerada transformación del PSOE en su conquista del poder político. Además, se analizará con detenimiento la procedencia política, social, profesional, académica e ideológica de los principales *hombres económicos* tanto del Partido como del Gobierno, que conformarían lo que, en ocasiones, se denominó como el “gobierno paralelo en la sombra” del propio Felipe González.

2.1.2. 2ª Hipótesis de trabajo. Los ejecutivos socialistas y la reestructuración del modelo capitalista español (1982-1992)

¿En torno a qué objetivos centrales basculó el proyecto de modernización socialista en la apertura y consolidación de una nueva etapa en la historia del capitalismo español? Esta es nuestra segunda pregunta a resolver. Nos internamos aquí ante un debate tan inacabado como necesario de abordar. ¿Cuáles fueron los verdaderos *márgenes de actuación* de los socialistas a

su llegada al poder? ¿La adopción de sus decisiones estarían motivadas por los *clásicos dilemas de la socialdemocracia* –los conocidos *trade-off*– durante la década de los ochenta del siglo XX? ¿El peso de la llamada “herencia recibida” sería tal que obligaría a los técnicos y políticos socialistas –por este orden y no otro– a amparar determinadas medidas, que aunque no formaban parte del programa electoral no tuvieron más que remedio que llevarlas a cabo? ¿Qué pasó, en definitiva, con el tan aireado y recordado programa electoral de 1982? Llegados aquí, ¿el proyecto de modernización socialista fue la “única política posible” como con tanto ahínco defenderían los propios socialistas tanto durante como a su salida del Gobierno? Y lo que es más relevante, ¿aumentaron las tasas de explotación capital-trabajo durante la década de la consolidación de la democracia? O dicho en términos más “coloquiales”, ¿era la sociedad española en mil novecientos noventa y dos más igualitaria que diez años antes?

Frente a esta hipótesis de trabajo múltiple se han diseñado los siguientes caminos de aproximación:

1.- En primer término, se adoptaría aquí en este trabajo una visión que superara la mera concepción institucional del Estado, tan típica de una historia política que tiende a quedarse en la “superficie” de los grandes acontecimientos políticos. Es decir, se esbozará un estudio de economía política. Como en parte ya ha quedado reflejado de forma previa en la *Presentación*, el Estado no es un actor neutral, sino que forma parte del engranaje de los mecanismos de reproducción y por ende de explotación. Es decir, partimos del carácter “de clase” que imprimirán los socialistas a sus respectivas actuaciones económicas y laborales. Un punto de partida, que a su vez nos ayudará a resituar el papel histórico que asumirían y decidirían jugar los socialistas a lo largo de su mandato.

2.- En este mismo orden de prioridades analíticas, la pregunta lógica a formularse es: ¿suponen, acaso, los ejecutivos socialistas una ruptura con los gobiernos centristas en lo referente a la política económica de salida a la crisis económica capitalista por la que atraviesa España en esos años, y que se inaugura con los *Pactos de la Moncloa*? Visto esto, ¿qué tipo de política económica se concibe tras el aparataje discursivo de la modernización socialista? Para responder a lo anterior, se examinará, lógicamente, el tipo de políticas que se desarrollarán desde el primer Consejo de Ministros celebrado un martes 7 de diciembre y que, en grandes líneas, se mantendrán durante la década de la consolidación de la democracia.

3.- No obstante, para avanzar con seguridad –y *desmitificar* no pocos lugares comunes de tiempo histórico– nos detendremos por los componentes económicos, políticos e ideológicos que sustentarán el propio proyecto de modernización socialista. El Partido Socialista Obrero Español, ¿desde antes de su llegada al poder tenía previsto la formulación de su proyecto liberal económico, tal y como se desarrolló con especial intensidad y de forma clara y evidente en 1984 con la puesta en marcha del Programa Económico a Medio Plazo? ¿Existía un programa “oculto” por parte de los socialistas españoles? Nos interesa sobremanera, por tanto, historiar con detenimiento el papel que juegan las principales cabezas visibles –Boyer y Solchaga– como las invisibles –el equipo “liberal” de economía e igualmente las presiones de los llamados “poderes fácticos”– así como los condicionamientos internos y externos a los que se enfrentan durante todos estos años.

Bajo las bases programáticas e ideológicas de la “misión histórica” y de la puesta en marcha del “proyecto de modernización” así como de cara a dar respuesta a todos los anteriores interrogantes, se recorrerá, etapa por etapa, año por año, la política económica de los gobiernos socialistas, siempre en línea con la perspectiva global aquí delineada: su papel histórico dentro de la historia del capitalismo español entre 1982 a 1992. Una visión macrohistórica a la par que macroeconómica, en donde se hace más que necesario examinar sus principales puntos de apoyo políticos –antes que su propia concepción económico-ideológica– así como sus resultados económicos.

La contestación múltiple a tales interrogantes se localizan en los tres capítulos que conforman el III Epígrafe –Los ejecutivos socialistas y la reestructuración del modelo capitalista español (1982-1992)– A saber, el Capítulo 6 –La «revolución burguesa pendiente»: las

vicisitudes de la *única política posible* y/o el síndrome NHA– el Capítulo 7 –La segunda fase de reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de crecimiento– y el Capítulo 8 –El precio de la modernización. «Principios de realidad» esenciales: los resultados macroeconómicos–. En los mismos se presentan numerosos como fundamentados argumentos así como todo un amplio conjunto de datos económicos, que ponen en cuestión, justamente, la tesis central de los socialistas: la inevitabilidad de su política económica pero también el alcance económico como social de sus propios *logros*. En concreto, en el Capítulo 8 tratará de refutarse uno de los interrogantes que recorren toda la investigación: el incremento de las tasas de explotación capital-trabajo durante aquellos años. Puntos de partida, desde el que interpretar el papel histórico decisivo jugado por los ejecutivos socialistas en el proceso de reestructuración del capitalismo nacional.

2.1.3. 3ª Hipótesis de trabajo. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo

En relación a la tercera de las hipótesis de trabajo se modificará nuestra escala de visión investigadora, a partir de la presentación de nuestro estudio de caso, tal y como se ha adelantado. Así pues, se optará por un enfoque microhistórico. Antes de responder a la pregunta central –*¿Cuáles fueron los principales costes sociales y humanos de las políticas reformistas-liberales de los ejecutivos socialistas con especial incidencia en la metamorfosis de la realidad laboral?*– se imponen otras tantas. La primera: ¿el proyecto de reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 estaba previsto con antelación a su llegada al poder, o, fueron las propias circunstancias de crisis económica generalizada y la expansión de un alto desempleo estructural, las causas que les llevarían a plantear la misma? De nuevo, ¿el programa electoral se quedaría en *papel mojado*? ¿Cuáles serían los motivos últimos para dar un giro tan radical en su concepción tradicional de política de empleo? ¿La reforma liberal del Sistema Español de Relaciones Laborales también se constituyó también en la “única política posible”? O dicho de otra forma, ¿puesto en marcha el proyecto modernizador, la reforma del propio Estatuto de los Trabajadores resultaría inevitable? ¿La temporalidad –vía reducción derechos laborales y vía precarización de las relaciones laborales sumada a una ortodoxa política de moderación salarial– formaba parte de la estrategia microeconómica liberal del socialismo español? ¿A qué riesgos y contradicciones se enfrentaron en este mismo terreno? Preguntas y más preguntas, que están detrás de lo que hemos definido como el *precio de la modernización* así como de los costes sociales y humanos de tal proceso de cambio. Pero que a su vez también nos enfrenta ante otro interrogante mayor: ¿los socialistas contaban con un proyecto político a medio y largo plazo? O por el contrario, ¿primaría el pragmatismo junto la búsqueda de respuestas adaptativas a corto plazo?

En esta tesitura se ha diseñado el siguiente modelo investigador:

1.- Reconstruir, desde una perspectiva histórica social del Derecho del Trabajo, la historia de la contratación temporal desde 1976 a 1992/1996, nos permite situarnos ante el singular proceso de liberalización y flexibilización del ordenamiento jurídico-laboral español. Aspecto este siempre obviado en la mayor parte de los exámenes históricos.

Desde las primeras medidas que ponen en marcha los gobiernos de la Monarquía –no democráticos– pasando por los de UCD, se nos dibuja la propia realidad socioeconómica a la que tendrían que enfrentarse el primer Ejecutivo socialista como el principal problema a resolver. Un tiempo intenso en acontecimientos como en transformaciones, repleto así mismo de nuevos debates –nacionales e internacionales– de nuevas estrategias pero sobre todo de medidas que van a situarnos frente a un contexto sociolaboral enormemente delicado. Un enfoque, que no sólo se preocupa en exclusiva por lo que se publica o no se publica en el BOE sino por los cambios en la correlación de fuerzas entre capital-trabajo en pleno proceso de transición sindical y de democratización, por ende, del marco de relaciones laborales. Un

planteo con la vista puesta también en lo que sucede en las calles en unos años de intensos como violentos conflictos obreros.

2.- Igualmente se trata de reconstruir –a partir de una realidad documental, en cierta medida, fragmentada– la posición política del PSOE –y de la UGT y de Comisiones Obreras en paralelo– en relación a su política laboral desarrollada durante todos estos años. Para ello se examinan detenidamente no sólo los documentos partidistas o gubernamentales –públicos o confidenciales– sino además las posiciones estratégico-políticas que se van adoptando frente a los principales cambios legislativos del ordenamiento laboral, vía negociación de Reales Decretos, acuerdos sociales o de la propia elaboración del Estatuto de los Trabajadores de 1980. Aquí, las preguntas formuladas en la *hipótesis 2ª* acerca del peso del pragmatismo en sus decisiones frente a la posible coherencia en torno a su programa político-ideológico, se retoman plenamente.

3.- Con el fin de examinar e interpretar las interioridades de este proceso histórico central de nuestro tiempo –las negociaciones en torno a la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 y el posterior Acuerdo Social Económico– se ha optado por un modelo de análisis microhistórico. De esta forma, nos detendremos por lo que sucede a nivel político, económico, sindical, social... entre mayo de 1983 a diciembre de 1984. Veinte meses, más de setecientos días en donde se asistirá a la definitiva transición del ordenamiento laboral. Un enfoque, que nos viabilizará a acercarnos a tres cuestiones claves: a) las propias dificultades inherentes de la puesta en marcha de la lógica de la modernización en su perspectiva micro-laboral; b) al mismo tiempo tal perspectiva también nos aproximaría a las respuestas sociales y obreras contra la propia puesta en marcha de las reformas socialistas. Un tiempo en el que confluirán tres procesos contestarios: primero, los derivados de la propia crisis económica, segundo los relacionados con el proceso de desindustrialización, y tercero, los estrictamente vinculados a las reformas laborales. Lo que todo sumado –especialmente durante el largo I Trimestre de 1984– configurará un escenario de crisis generalizada así como de violencia social y una extendida represión policial. Como trataremos de demostrar no sólo se está ante el final del “ciclo de luchas” procedente de la transición, sino ante uno de los últimos capítulos de “luchas de clases” en la España contemporánea; c) pero igualmente esta propuesta de investigación, nos posibilita observar con una precisa nitidez los costes que tanto para el Gobierno como para el Partido va a conllevar la puesta en marcha de sus políticas modernizadoras-liberales en el campo laboral pero también en los restantes. *Costes*, en términos electorales, de descrédito político, pero también a nivel interno en relación a la progresiva apertura de unas diferencias cada vez más grandes con el sindicato hermano, hasta la posterior ruptura de la familia socialista. Un modelo, por último, que ofrece un detallado análisis de las fluidas relaciones entre el socialismo y los representantes del capitalismo español –principal aunque no únicamente con la CEOE, el sector financiero, el Círculo de Empresarios...– y toda una serie de acuerdos y pactos –secretos o no– que explican, en definitiva, el resultado final de la citada reforma laboral. En resumen, se aporta una visión a escala micro de la estrategia de la modernización socialista, en donde, al mismo tiempo, se trata de visualizar el cambio de correlación de fuerzas que están detrás de los citados costes sociales y humanos de la política económica de aquel tiempo.

Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo es el título del IV Epígrafe de la presente investigación. Un Epígrafe compuesto por cuatro capítulos: el Capítulo 9 –En nombre de la «modernización»: *el mandato de la flexibilidad* (octubre 1976-febrero 1983)– Capítulo 10 –Historia e intrahistoria de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 (marzo/mayo 1983-febrero 1984)– Capítulo 11 –En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero/febrero 1984-julio 1984)– y el Capítulo 12 –La «necesidad hecha virtud»: el difícil parto del Acuerdo Económico y Social (febrero 1984-diciembre 1984). Apartados en donde se irán desgranando, etapa por etapa, las políticas laborales flexibilizadoras así como sus resultados directos en la configuración de un amplio conjunto de nuevas realidades laborales. En concreto, y junto con los datos macroeconómicos

presentados a lo largo del III Epígrafe, se aportará un balance cualitativo pero a su vez cuantitativo de los costes y consecuencias de todo tipo y orden, que conllevará el nacimiento, primero, de la “cultura de la temporalidad” y, en segundo lugar, de la “cultura empresarial de la precariedad”. Es decir, nos situamos ante las propias bases que se encuentran tras la “formación histórica” de la *generación de la cultura de la precariedad*.

Una realidad histórica, a partir de la cual contestar a otros tres importantes interrogantes: ¿La aparición de la precariedad laboral puede atribuirse a unos *costes queridos* o *no queridos* tanto por parte del gobierno como por parte de la patronal? ¿La precariedad laboral de un amplio sector de la población asalariada, se constituyó una condición *sine que non* de la estrategia de la modernización? ¿Quiénes fueron los *ganadores* y *perdedores* de este proceso de cambio económico y social?

2.2. Un estado de la cuestión de circunstancias

El presente estado de la cuestión en torno a los gobiernos socialistas de la cuestión bien puede calificarse de “circunstancias”. Nos explicamos. Desde el campo de la historiografía profesional la producción sobre este tiempo histórico resulta escasa, limitada y poco trascendente. Una situación que responde a tres hechos: primero, la barrera cronológica que sigue existiendo en torno a la fecha de 1982 de cara al trabajo de los historiadores, con sus lógicas aunque contadas excepciones; segundo, lo anterior ha conllevado a la práctica inexistencia de investigaciones históricas –con visitas a archivos incluidas– más allá de las aportaciones en forma de manuales o artículos científicos, que, por regla general, se han limitado a visiones generalistas propias de una historia política, en base a fuentes secundarias; lo que conduce de forma obligada, en tercer lugar, a abordar tal tiempo histórico desde otras disciplinas, que, por el contrario, han examinado desde sus propios intereses la época socialista.

En torno lo que aconteció entre 1982 a 1996 se cuenta con un corpus bibliográfico sobresaliente. En el mismo momento en que se profundiza en él, un simple repaso a lo generado desde las ciencias económicas, pasando por el derecho laboral, la sociología, la politología o el periodismo de investigación, dibujan un escenario repleto de datos, documentación, testimonios... materiales todos ellos de fácil acceso. Y ahí entra el trabajo de selección y de depuración de los historiadores.

En las siguientes líneas, se trata de abordar esta compleja realidad. Compleja ya que implica internarse por campos alejados de nuestra disciplina. A ello se añade la inexistencia de obras básicas de referencia en la mayor parte de los casos. Por tanto, se hace necesario *buscar* y *rebuscar* en diferentes monografías, artículos científicos, capítulos de obras colectivas, para reconstruir desde una realidad fragmentada una visión global. Así pues, y de cara a no alargar en exceso en este estado de la cuestión, nos detendremos en las principales aportaciones, líneas de investigación y debates que son de interés para nuestro objeto de estudio.

2.2.1. Ciencias económicas: un campo de batalla entre interpretaciones radicalmente diferentes entre sí

«Nunca se ha empleado, en cambio, el término ‘capitalismo’, que era el que usaban para definirlo sus enemigos del llamado bando socialista. Incluso hoy, al cabo de tantos años de acabada la guerra fría, se mantiene el tabú: en marzo de 2012 el Departamento de Educación del Estado de Texas proponía que en los libros de texto se usase la expresión ‘sistema de libre empresa’, porque consideraba que el término ‘capitalismo’ tiene connotaciones negativas».

Josep FONTANA, *Por el bien del Imperio*⁵.

⁵ FONTANA, Josep, *Por el bien...*, *op.cit.*, p. 11. Consúltense también las aportaciones de, BLYTH, Mark, *Great transformations: economic ideas and institutional change in the twentieth century*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

El ejemplo de Josep Fontana es perfectamente extrapolable a nuestro caso. Se ha interiorizado de tal forma el sistema capitalista como el único orden o régimen vigente posible, que con su simple enunciado pareciera que se cruzan determinadas líneas de lo “políticamente correcto”. De cualquier forma, estamos ante un proceso reciente en términos históricos. No hace más de dos décadas escasas, todavía en los libros escolares se matizaba esta circunstancia, o mejor dicho, esta realidad histórica. Hoy, no sólo es infrecuente hablar de economía capitalista, sino simplemente de economía de mercado.

Lo anterior lógicamente ha tenido su traslación con el creciente predominio hasta su conversión en la escuela dominante, de la visión liberal/capitalista de la economía a nivel académico⁶. Un proceso académico en paralelo a la realidad histórica económica del país. En este sentido, la reestructuración del modelo capitalista español así como la *imposibilidad* de cualquier otra vía de desarrollo y crecimiento bajo los gobiernos socialistas, sería determinante en este fenómeno descrito. El siempre enunciado *desencanto* con los socialistas, tras el inicial entierro del “espíritu de cambio” del año 1982, conformarían las bases sociales, intelectuales pero sobre todo psicológicas de este doble proceso.

Estas matizaciones resultan harto necesarias de cara a cualquier posible estado de la cuestión, pero sobre todo de cara a la crítica de las interpretaciones mayoritarias existentes. Señalamos esto, por una cuestión que, en parte, ya se ha esbozado. La mayor parte de las interpretaciones procedentes de las ciencias económicas, pero también de la sociología como de la ciencia política, se ha asumido implícitamente –sin aparentes ni mayores problemas– la tesis argumentativa que emplearían los propios socialistas para justificar el rumbo de su política económica: no había otra política económica posible, en consonancia con las tesis del neoliberalismo británico encabezado por Margaret Thatcher. Un argumento que esconde la asunción del axioma político-técnico e ideológico central explicativo de la última fase del capitalismo. Una justificación que a pesar de atentar contra la propia *lógica* misma, constituye el punto de arranque de la mayor parte de los estudios sobre este tiempo histórico.

Se podrá discutir cómo y de qué forma la política económica de los ejecutivos socialistas se enfrentaría a los clásicos dilemas (*trade-off*) de otros gobiernos socialistas europeos; como se podrá debatir cuáles fueron los márgenes de actuación posibles frente al recrudecimiento de la crisis económica a principios de 1983; lo que en ningún caso se puede dar por sentado son las propias tesis de los socialistas, que también supieron conectar a su vez con los postulados de la escuela liberal dominante.

En esta situación, y como veremos en el II epígrafe de la presente investigación, se han dado por supuestas no pocas *ideas-fuerzas*, producto de falta de estudios que hayan analizado históricamente las dificultades y contradicciones por las que pasaron los equipos económicos socialistas. Entre estas *ideas-fuerzas*, una de las más relevantes ha sido la de configuración de un equipo competente y eficaz. Nada más lejos de la realidad. Como también se cae abajo la imagen transmitida de la existencia de un proyecto ya no a medio plazo, sino a corto plazo. El proyecto de la modernización socialista se construiría paso a paso, especialmente tras la salida de Boyer del Gobierno en 1985. Lo anterior, y por no extendernos más, entra en clara contradicción con la tesis de la “única política posible” esgrimida durante tantos años y que todavía hoy forma parte del núcleo explicativo central de este tiempo.

Por tanto, acercarnos –aunque sea de forma breve– a lo aportado por las ciencias económicas, nos revela, como en otros pocos ámbitos, el enfrentamiento entre interpretaciones radicalmente distantes entre sí. De ahí la necesaria división que se ha de establecer entre la

⁶ Ilustrativo de lo dicho son las reflexiones y tesis de, MARSÍ, Luca, “El pensamiento «economicista», base ideológica del modelo neoliberal”, *Historia Actual Online*, nº 14, (2007), pp. 175-190. En sentido similar aunque con otra perspectiva, ALVAREZ-URÍA RICO, Fernando, “Regreso a Bretton Woods: de cómo la «ciencia económica» se desvinculó de la «economía política», *Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura*, nº 83-84, (2008), pp. 13-20.

escuela liberal y la escuela crítica, cada una, al mismo tiempo, con diferentes enfoques y visiones.

Dentro de la “escuela liberal” –con no pocos *economistas comunistas* en su tiempo reconvertidos posteriormente a la *causa* como José Luis Malo Molina o Julio Segura, por no hacer larga una posible lista– habría que establecer dos claras orientaciones: la visión liberal clásica y la progresista-liberal. Aunque en ninguno de los casos se cuestiona la propia naturaleza del régimen económico-político, así como en lo referente a la necesidad de las políticas emprendidas por el equipo económico socialista; sí se pueden apreciar considerables diferencias a la hora de valorar los propios costes económicos de las citadas políticas. Todo ello en clara alusión a la funcionalidad y viabilidad del sistema en su conjunto. Su reportorio explicativo aunque aparentemente amplio, es reducido en tanto los consensos en torno a la defensa y legitimación del “sistema de libre empresa” son notablemente mayores frente a los posibles y escasos disensos.

En todo caso, nos hallamos ante las visiones mayoritarias dentro y fuera de la academia. Sus componentes no sólo están al frente de las principales revistas científicas, o de las más importantes empresas editoriales especializadas, sino que además han guardado y guardan estrechos vínculos tanto con los diferentes ejecutivos como con diferentes grupos de presión –vía centro de estudios, vía *think tank* o directamente los principales grupos mediáticos–. Una doble perspectiva, entre lo académico y lo político.

En lo referente al primer grupo –dentro del cual habría que diferenciar a su vez a diferentes escuelas como las de Madrid o la de Salamanca– habría que incluir a Gonzalo Anes⁷, Juan Velarde⁸, Guillermo de la Dehesa⁹ –un economista con importantes cargos dentro del Ministerio de Economía en los ejecutivos socialistas– José Luis Malo de Molina¹⁰, Carlos Rodríguez Braun¹¹ –como paradigma militante del liberalismo– y lógicamente a Enrique Fuentes Quintana, tanto en su papel de político como de economista, como en lo relacionado con su condición de testimonio, sin olvidar su labor de editor así como director en su momento de *Papeles de Economía Española*¹². Un simple repaso por sus principales obras evidencia su “percepción crítica” acerca de las insuficiencias del capitalismo español, ante su bajo nivel de liberalización e internacionalización, cuyos problemas se originarían, precisamente, en la gestión del proyecto de la modernización socialista. En lo referente al segundo grupo citado, de enorme interés y valor han sido, en primer lugar, las obras colectivas dirigidas por José Luis

⁷ ANES, Gonzalo (ed.), *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1999.

⁸ VELARDE FUERTES, Juan, *Los años en que no se escuchó a Casandra. O el fracaso de la expansión de 1985 a 1992*, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1993.

⁹ DEHESA, Guillermo de la, “Balance de la economía española en los últimos veinticinco años”, *Información Comercial Española*, nº 811, (2005), pp. 53-79; id., *Lecturas de política económica española*, A Coruña, Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza [1999].

¹⁰ MALO de MOLINA, José Luis, “Una visión macroeconómica de de los veinticinco años de vigencia de la Constitución Española”, *Documento Ocasional. Banco de España*, nº 0307, (2003).

¹¹ Por citar tan sólo algunas de sus últimas aportaciones: RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, *Estado contra mercado*, Madrid, Taurus, 2008; id., *Diez ensayos liberales*, Madrid / Barcelona, LID, 2008; y, id., *Una crisis y cinco errores*, Madrid, Lid, 2009.

¹² FUENTES QUINTANA, Enrique, *Las reformas tributarias en España: teoría, historia y propuestas*, Barcelona, Crítica, 1990; id. y ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, *De peores hemos salido: una aproximación a nuestra historia más reciente*, Madrid, Mercado, 1993; id., *El modelo de economía abierta y el modelo castizo en el desarrollo económico de la España de los noventa*, Zaragoza, Publicaciones Universitarias de Zaragoza, 1995; id. [et al.], *La Hacienda en sus ministros. Franquismo y democracia*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997; id. (coord.), *Economía y economistas españoles*, IX vols., Barcelona, Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 1999.

García Delgado¹³, sin duda, uno de los grandes conocedores y estudiosos de esta época. A las que habría que añadir las de Joaquín Estefanía¹⁴, Julio Segura¹⁵, José María Serrano Sanz¹⁶ y José V. Sevilla Segura¹⁷ –quien también formaría parte del primer equipo económico de Economía, y cuya salida se produciría en medio de un escándalo político tras su enfrentamiento con Miguel Boyer–. Autores que han sostenido, a la postre, posiciones más cercanas con la salida económica liberal adoptada por los ejecutivos socialistas.

No estaría completo este sintético repaso, sin destacar las aportaciones relacionadas con la historia económica de un grupo de economistas encuadrables en este primer gran grupo. Principalmente nos referimos a las líneas de investigación seguidas por Francisco Comín¹⁸ y Pablo Martín Aceña¹⁹. Autores que en estos últimos años han publicado diferentes trabajos, que van desde estudios sobre la Hacienda Pública, pasando por la historia de la empresa en España o el Servicio de Estudios del Banco de España hasta el papel económico del Instituto Nacional de Industria.

Cuando hablamos de “escuela crítica” han de realizarse una serie de matizaciones. La calificación de “crítica” no es gratuita. Las aportaciones de los economistas críticos responde no sólo a un simple enfoque “anti-capitalista” o “alternativo” en sus obras, sino a una cuestión de más relieve: su enfrentamiento con las tesis hegemónicas de la escuela liberal. Visiones minoritarias –tanto cuantitativamente como en el reflejo de un posible estado de la cuestión– que, no obstante, han generado una considerable bibliografía en estas últimas décadas, por más que su difusión y conocimiento sea menor tanto dentro como fuera de la academia. Excluidos de los grandes debates así como ausentes de los consejos de las principales revistas económicas académicas, su labor, sus publicaciones, en cualquier caso, han conseguido traspasar en más de un ocaso la invisibilidad a las que se les suele someter.

Procedente o no del marxismo, y desde visiones tanto macro como micro económicas, este tipo de visiones económicas han venido a chocar no sólo académica sino socialmente, en tanto cuestionaban, punto por punto, los resultados de estos últimos treinta años de historia económica. Si desde la escuela liberal, por ejemplo, las preocupaciones han girado en torno a la funcionalidad de las políticas emprendidas y siempre preocupadas por las grandes equilibrios macroeconómicos; este conjunto de autores “críticos” han puesto el acento, por el contrario, en

¹³ GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *Economía española de la transición y la democracia, 1977-1986*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1990; id. (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999; y, id. y JIMÉNEZ, Juan Carlos, *Un siglo de España: la economía*, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2001.

¹⁴ ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha. Medio siglo de política (económica) entre la historia y la memoria*, Barcelona, Península, 2007; id., *La Trilateral Internacional del capitalismo: el poder de la trilateral en España*, Madrid, Akal, 1979.

¹⁵ SEGURA, Julio (coord.), *La productividad en la economía española*, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2006. Unos años antes, id., *Teoría de la economía industrial*, Madrid, Civitas, 1993; y, id. y RODRÍGUEZ BRAÚN, Carlos (eds.), *La economía en sus textos*, Madrid, Taurus, 1998.

¹⁶ SERRANO SANZ, José Mª y COSTAS COMESAÑA, Antón, *Diez ensayos sobre economía española*, Madrid, Eudema, 1993; y unos años antes los mismos autores en, id. y id., *Ideas y políticas en la economía española de la crisis*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1988.

¹⁷ SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política de la crisis española*, Barcelona, Crítica, 1985.

¹⁸ COMÍN, Francisco, *Historia de la Hacienda Pública*, II vols., Barcelona, Crítica, 1996, vol. II, *España (1808-1995)*; id. y ZAFRA, Juan (eds.), *El fraude fiscal en la Historia de España*. Dossier monográfico *Hacienda Pública Española*, nº I extra, (1994); o, id. y MARTÍN ACEÑA, Pablo (eds.), *La empresa en la historia de España*, Madrid, Civitas, 1996.

¹⁹ MARTÍN ACEÑA, Pablo, *El Servicio de Estudios del Banco de España (1930-2000)*, Madrid, Banco de España, 2000. También, id. [et al.], *Empresa pública e industrialización en España*, Madrid, Alianza Editorial, 1990; id. y COMÍN, Francisco, *INI: 50 años de industrialización en España*, Madrid, Espasa Calpe, 1991.

los otros costes *invisibles* para los autores liberales así como en la propia viabilidad económica y social del sistema capitalista. De tal forma, que dependiendo de la lectura que se efectúe pareciera que estuviéramos ante dos países, dos economías.

Igualmente aquí, ha de diferenciarse varios enfoques e interpretaciones. Desde los autores que han defendido en España la tradición keynesiana-socialdemócrata –David Anisi²⁰, Carlos Berzosa²¹, Gregorio Rodríguez Cabrero²², Esteve Mora²³– a los seguidores de Ernest Mandel²⁴ – Pedro Montes²⁵– pasando por los autores que se han situado desde una confluencia de intereses lejos de la ortodoxia económica convencional –Juan Torres López²⁶, Juan Francisco Martín Seco (economista, que también estaría al frente de varias secretarías de Estado durante la época socialista)²⁷, José Manuel Naredo (especialmente desde la economía ecológica)²⁸, o Ramón Marimon²⁹– hasta, claro está, la minoritaria escuela económica marxista en España.

No se oculta en estas líneas la clara influencia en esta investigación de las aportaciones de los autores marxistas. Aportaciones como las de Diego Guerrero –*La explotación. Trabajo y capital en España*³⁰– la obra coordinada por Miren Etxezarreta –*La reestructuración del*

²⁰ ANISI, David, *Creadores de escasez: del bienestar al miedo*, Madrid, Alianza, 1995; id. [et al.], *Análisis económico de la exclusión social*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003; y especialmente, *Cuentos Económicos*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2005. Y, por último, id., “Economía: la pretensión de una ciencia”, *Revista de Economía Crítica*, nº 7, (2009), pp. 139-152.

²¹ BERZOSA, Carlos, “La política económica del PSOE: Condicionantes y presupuestos” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista a debate*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1986, pp. 71-80; id., *Economía, crisis o recuperación*, Madrid, Eudema, 1988; id., *Los socialistas utópicos. Marx y sus discípulos*, Madrid, Síntesis, 2000.

²² RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio (comp.), *Estado, privatización y bienestar: un debate para la Europa actual*, Barcelona, Icaria, 1991. En este sentido, véase también: GONZÁLEZ TEMPRANO, Antonio (dir.), *La política de gasto social (1984-1996): en la administración del Estado y de las Comunidades Autónomas*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.

²³ ESTEVE MORA, Fernando [et al.], *Modernización económica y desigualdad social*, Madrid, Caritas, 1992. Ahora bien, sería un amplio estudio del citado autor junto con Rafael Muñoz de Bustillo para el Instituto Sindical de Estudios, su aportación más concreta para la época socialista: AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989, sig. 001587-002.

²⁴ Hablamos en concreto de dos de sus obras más conocidas: primero, MANDEL, Ernest, *Las ondas largas del desarrollo capitalista: la interpretación marxista*, Madrid, Siglo XXI, 1986; y, en segundo lugar, id., *El capitalismo tardío*, México, Era, 1979.

²⁵ MONTES, Pedro, *La integración en Europa: del plan de estabilización a Maastricht*, Madrid, Trotta, 1993; id., *El desorden neoliberal*, Madrid, Trotta, 1996.

²⁶ TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara de la política económica: España, 1982-1994*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994; TORRES LÓPEZ, Juan, *Desigualdad y crisis económica. El reparto de la tarta*, Madrid, Sistema, 1995.

²⁷ MARTÍN SECO, Juan Francisco, *¡La economía, estúpidos, la economía! La política económica del social-liberalismo*, Madrid, Libertarias, Prodhufi, 1993; id., *La pinza: dos partidos distintos y una sola política económica verdadera*, Barcelona, El Viejo Topo, 1997; id., *¿Para qué servimos los economistas?* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2010.

²⁸ NAREDO, José Manuel, *La economía en evolución: historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Siglo XXI, 1987; id., *La burbuja inmobiliario-financiera en la coyuntura económica reciente (1985-1995)*, Madrid, Siglo XXI, 1996.

²⁹ MARIMON, Ramón (ed.), *La economía española: una visión diferente*, Barcelona, A. Bosch-CREI, 1996.

³⁰ GUERRERO, Diego, *Acumulación del capital, distribución de la renta y crisis de rentabilidad en España, 1954-1987*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1989; id., *La explotación*.

*capitalismo en España*³¹– junto con los trabajos de Joaquín Arriola y Luciano Vasapollo – *Flexibles y precarios*³²– y las tesis doctoral de Sergio Cámara –*Tendencias de acumulación y de la rentabilidad del capital en España (1974-2001)*³³– o la de Maximiliá Nieto –*Dinámica salarial y tendencias de la distribución durante la onda larga del capitalismo español en la segunda mitad del s. XX (1954-2003)*³⁴– o las múltiples aportaciones de Jesús Albarracín –entre otras, *La economía del mercado*³⁵– ayudaron no sólo a clarificar la *otra realidad económica*, sino a proporcionar herramientas de análisis que habían pasado, en un principio, desapercibidas.

2.2.2. El Derecho del Trabajo y los economistas «laboralistas»

La presente investigación tampoco se puede entender sin la clara influencia que ha ejercido las enseñanzas del Derecho del Trabajo, a la hora de escudriñar los significados, direcciones y resultados de las reformas laborales, así como sus diferentes desarrollos legislativos en la España democrática. Por más que no sean comunes los lugares de aproximación entre historia y derecho, comparten preocupaciones y temáticas mutuas, y que dado el caso podrían ayudar a enriquecer ambas disciplinas.

Esta investigación camina entre la historia social totalizante y una historia social del Derecho del Trabajo. Una estrecha relación sustentada, en parte, por la proliferación de este último tipo de publicaciones, que abordarían en cada momento –y desde un presente histórico muy concreto– de forma detallada todos y cada uno de los avatares de la transformación de las relaciones laborales, con una multiplicidad de matices y una información, que se nos aparece indispensable para acercarnos a las “interioridades” de los cambios legislativos laborales en España.

Al igual que sucede con los estudios económicos, otros tanto se puede decir acá. En el momento en que se ahonda en las diferentes aportaciones, se puede distinguir claramente diversas escuelas con sus correspondientes aportaciones y debates. Unas escuelas, que junto con las lecturas ideológicas *ad hoc*, también guardan relación con las posiciones tanto partidistas como sindicales que han predominado en este tiempo.

A grandes trazos –y sin pretender plantear un balance exhaustivo y mucho menos especializado– para la época en que nos movemos las principales diferencias han estribado en la función que debe y tiene que jugar el propio Derecho del Trabajo, a la hora de interpretar los

Trabajo y...; GUERRERO, Diego, “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir. / ed.), *Delinquentes políticos...*, *op.cit.*.

³¹ ETXEZARRETA, Miren, *Informe sobre la economía española, 1970-1979: una visión crítica*, Barcelona, Edic. 2001, 1979; id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*; id. (coord.), *Crítica a la economía ortodoxa. Notas de trabajo para la formación en economía crítica*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona / Seminari d’Economia Crítica TAIFA, 2004; y, id., “Una aproximación crítica de la economía de la Unión Europea”, *Revista de Economía Crítica*, nº 3, (2005), pp. 97-127.

³² ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, *op.cit.*.

³³ CÁMARA IZQUIERDO, Sergio, *Tendencias de acumulación y de la rentabilidad del capital en España (1974-2001)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2003; y id., “La rentabilidad del capital en España”, *Revista de Economía Crítica*, nº 1, (2003), pp. 201-228.

³⁴ NIETO FERNÁNDEZ, Maximiliano, *Dinámica salarial y tendencias de la distribución durante la onda larga del capitalismo español en la segunda mitad del s. xx (1954-2003)*, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 2005. En esta misma línea, véase, MURRILLO ARROYO, Francisco Javier, “El progreso de acumulación en España (1973-2005): ¿Progreso material para todos?”. Comunicación presentada en, *XI Jornadas de Economía Crítica*, Bilbao, 27, 28 y 29 de marzo 2008.

³⁵ ALBARRACÍN, Jesús, *La onda larga del capitalismo español*, Madrid, Colegio de Economistas, 1987; id., *La economía del mercado*, Madrid, Trotta, 1991; id. [et al.], *La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los ochenta*, Madrid / Barcelona, Instituto Sindical de Estudios / Icaria, 1993. Y concretamente, id. (ed.), *Reflexiones sobre política económica*, Madrid, Editorial Popular, 1991.

cambios provenientes de la flexibilidad laboral. Aunque, lógicamente, aquí se está simplificando la cuestión –insistimos– lo que viene también a reflejar la evolución de las principales escuelas es una nueva correlación de fuerzas visible, perceptible, al menos desde la década de los ochenta del siglo XX³⁶. Lo que traducido en términos más concretos, se traslada a la progresiva pérdida garantista del Derecho del Trabajo, frente a un derecho que devendría cada vez más en un *derecho mercantil*, en consonancia con los propios cambios legislativos hasta llegar a hablarse de un “derecho del empleo”³⁷. Se estaría, por tanto, ante lo que Antonio Baylos con enorme maestría denominará la “culpabilización del Derecho del Trabajo”. Merece la pena detenernos en su explicación de corte histórico:

«El punto de partida es muy conocido. El sistema jurídico laboral español incorporó desde la primera etapa de construcción democrática tras la promulgación de la Constitución de 1978, este tipo de relación entre el mercado de trabajo y el derecho laboral como un elemento central de su estructura dinámica normativa. Al coincidir la implantación del sistema democrático de relaciones laborales con la crisis económica de mediados de los años 70, y la consiguiente repercusión de la misma en las diferentes economías nacionales europeas en términos de destrucción de empleo, desde el inicio en el sistema español se produjo una relación de causa a efecto entre el sistema de garantías que preveía el derecho del trabajo y estos procesos de pérdida acelerada de puestos de trabajo. Se produce así la *culpabilización del derecho del trabajo* debido a los procesos de destrucción de empleo [...]. De esta manera, una parte de la culpa del derecho del trabajo –de lo que se denominaba su regulación rígida y estatista de las condiciones de trabajo– se endosaba al conjunto de significados que habían perdido vigencia en la modernidad democrática por estar indisolublemente unidos a un mundo superado autocrático e incompatible con las nuevas exigencias de la economía libre»³⁸.

Sí una gran utilidad tiene seguir y examinar los debates del Derecho del Trabajo desde nuestra perspectiva, es porque nos permite obtener un ángulo privilegiado del progresivo deterioro de la “calidad” legal así como laboral de la figura del trabajador. Una evolución tempranamente observada por los propios iuslaboralistas al compas de las primeras reformas laborales –globales o parciales– del ordenamiento jurídico-laboral español. Precisamente, será a partir de las primeras medidas flexibilizadoras –a través de la contratación temporal o las políticas de fomento del empleo (principal vía empleada hasta el presente)³⁹– que en España

³⁶ Durante esta investigación que, en lo básico, se ha situado entre los años 2004 y 2012, se han sucedido múltiples reformas del ordenamiento jurídico-laboral siempre en el mismo sentido. A cada una de las mismas ha aplicado similar diagnóstico/pronóstico. De forma parcial o de forma total –como ha sido en el caso de la última reforma laboral a través del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, *de medidas urgentes para la reforma laboral*– las mismas han ido limando el concepto garantista del Derecho del Trabajo. La situación está llegando a tales cuotas, que lejos de las tradicionales advertencias de las “voces críticas” –precisamente, las que anunciaron (con razón) a mediados de los años ochenta lo que ahora está sucediendo– ya se habla claramente de un “retorno a las fórmulas liberales más puras del *laissez faire*”, a través de la propia *flexibilización del derecho del Trabajo*. Teniéndose que recordar cuestiones tan básicas, como que el «derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y que el código jurídico es un instrumento civilizador de las relaciones humanas». CASARES i POTAU, Francesc, PÉREZ SUBIRANA, Andrés, BARCELÓ CISQUELLA, Judith y BOLANCEL FERRER, Jessica, “La destrucción del derecho laboral”, *El País*, 17 de febrero de 2012.

³⁷ Consúltense: MOLINA HERMOSILLA, Olimpia, *La dimensión jurídica de la política de empleo: el derecho del empleo como nueva categoría sistemática*, Sevilla, Mergablum, 2006. También, SARAGOSSÀ i SARAGOSSÀ, Josep Vicente, *Derecho del empleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002.

³⁸ BAYLOS, Antonio, “Mercado de Trabajo y Derecho de Trabajo: el caso español (1977-2007)” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*, p. 206. Véase asimismo de cara a una visión global: CARVALE, Mario, *Storia del Diritto nell'Europa Moderna e Contemporanea*, Roma, Laterza, 2012.

³⁹ Entre otras muchas obras al respecto véanse las siguientes en torno a las medidas de política de fomento del empleo: GARCÍA NINET, José Ignacio (dir.) y ARÁNTZAZU, Vicente Palacio (coord.), *Contratación temporal y medidas de fomento de empleo*, Barcelona, Atelier, 2009; GARCÍA PIQUERAS, Manuel, *Los contratos temporales: el empleo incentivado*, Granada Comares, 1993; PÉREZ

llegarán tempranamente desde 1977 al compás de las primeras respuestas liberales a la crisis económica por parte de los primeros gobiernos democráticos de UCD; cuando las diferencias entre los enfoques en juego se vayan agrandando. Aquí, una vez más, al igual que en lo que sucedería en el ámbito económico, frente a la creciente flexibilización liberal del mercado de trabajo –presentada también como la “única política posible” con tan sólo ligeros matices argumentativos– surgirá una escuela mayoritaria a favor de este tipo de medidas. Una escuela, que bien se puede catalogar como contractualista liberal, y que hoy tiende a ser hegemónica a nivel académico, y que a su vez ha servido de soporte político a múltiples modificaciones laborales, a través del encargo de no pocos informes gubernamentales⁴⁰. Un grupo de juristas que hoy son los considerados y catalogados como “expertos”, a nivel mediático y político, y que por más que pueda resultar contradictorio son los principales impulsores de la mercantilización del derecho laboral. A ellos se sumarían un conjunto de “economistas laborales” que no sólo actuarían como *propagandistas académicos* de la liberalización de las relaciones laborales, sino también como actores políticos de este mismo proceso histórico.

Frente a los anteriores, surgirían no pocas respuestas de tipo progresista o más claramente vinculadas a las posiciones mantenidas por los dos grandes sindicatos “de clase”. Respuestas, en la mayor parte de los casos, de signo defensivo ante el recorte garantista del ordenamiento jurídico-laboral. Una posición que, en la práctica, se ha mantenido inalterada desde los años de la transición a la democracia⁴¹.

Ahora bien, si en la década de los ochenta estas respuestas mantendrían una cierta homogeneidad, será a partir de los primeros noventa y especialmente ya en esta década y media última, en cuanto se diversificarán sus criterios frente a la ofensiva liberal/flexibilizadora que ha acompañado a cada reforma laboral. La base unificadora, justamente, la proporcionaría el rechazo a la expansión factual de la contratación temporal. Un problema este no sólo en el terreno jurídico, sino que desbordará, en breve, las propias reglas del Derecho del Trabajo y que se observara, de forma precisa, en el terreno de la jurisprudencia. Por otro lado, sería en torno al papel qué puede y debe jugar la negociación colectiva –justo en el momento de mayor debilidad

PRADO, Daniel, *Los instrumentos económicos del fomento del empleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011; y, OLARTE ENCABO, Sofía, *Políticas de empleo y colectivos con especiales dificultades: la “subjetivación” de las políticas activas de empleo*, Navarra, Thomson Arandazi, 2009. Desde otro ángulo: CRUZ VILLALÓN, Jesús, *Eficacia de las normas laborales desde la perspectiva de la calidad del empleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011. Y desde una perspectiva comparativa: ALUJAS RUIZ, Joan Antoni, *Políticas activas de mercado de trabajo en España: situación en el contexto europeo*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003. En esta misma línea también, HERRADOR BUENDÍA, Félix, *Política social de mercado de trabajo en España: el origen del proceso de europeización de la política de fomento del empleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008. Por último, consúltese el informe del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, *Desequilibrios ocupacionales y políticas activas de empleo [sesión ordinaria del Pleno de 26 de enero de 2005]*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2005.

⁴⁰ Por remitirnos, en primer término, a dos de los informes institucionales de mayor trascendencia jurídico-histórica: SEGURA, Julio, DURÁN, Federico, TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel, *Análisis de la..., op.cit.* [También consúltese aquí, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *La reforma política de empleo y de los servicios públicos de empleo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991]; y, CRUZ VILLALÓN, Jesús, DURÁN, Federico, JIMENO, Juan Francisco, OLALLA, Miguel Ángel, RUESGA, Santos M., SÁEZ, Carmen, TOHARIA, Luis y VALDÉS DAL-RE, Fernando, *Más y mejor..., op.cit.*. Caso excepcional aparte sería el informe publicado en 1988 por el Ministerio de Economía, y que en aquella ocasión indagaría sobre las altas dimensiones de la economía sumergida: MURO, Juan de Dios, RAYMOND, José Luis L., TOHARIA, Luis y URIEL, Ezequiel, *Análisis de las condiciones de vida y trabajo en España*, Madrid, Secretaría de Estado de Economía, 1988. Y, por lo demás, más recientemente: TOHARIA, Luis (dir.), *El problema de..., op.cit.*

⁴¹ Ilustrativo al respecto, CARRETERO MIRAMAR, José Luis, “La imparable crisis del derecho del trabajo”, *Nómadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, nº 19, (2008), pp. 415-420. Véase igualmente, NORES TORRES, Luis Enrique, “El «genoma» laboral: orígenes, componentes y evolución del derecho del trabajo”, *Quaderns de Ciències Socials*, nº 7, (2007), pp. 1-52.

sindical— uno de los puntos de discrepancia principales. A lo que sumará la defensa más abierta o cerrada del propio papel garantista del Derecho del Trabajo frente a la política económica cada vez más hegemónica que tienden a mercantilizar —sin límites— las reglas laborales del mercado de trabajo, y que sería aplicada de forma similar tanto por gobiernos progresistas como conservadores. Pero ante todo el núcleo de las diferencias radicaría, en lo básico, en la posición que se tomaría durante el periodo de 1982 a 1996 frente a los acuerdos sociales pero sobre ante la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984, a la hora de la expansión de la flexibilidad interna y externa del mercado de trabajo.

A pesar de que hoy existe un consenso bastante generalizado sobre las consecuencias negativas de la extendida temporalidad —y por consiguiente de la precariedad laboral— así como de la necesidad de reconducir este problema laboral-económico; las propuestas de solución difieren considerablemente. En todo caso, resulta extraordinariamente complicado diferenciar entre las propias posiciones académicas y políticas en este mismo terreno como ya se ha dicho.

En el primer bloque, se ha de citar necesariamente los trabajos de Federico Durán⁴² y Juan Antonio Sagardoy⁴³, entre otros muchos. Visiones mayoritariamente liberales —o más bien, *neoliberales*— con no pocos rasgos conservadores a su vez. A los que habría que añadir las aportaciones de los citados “economistas laboristas liberales” como Juan Francisco Jimeno⁴⁴, José Luis Malo Molina⁴⁵, Samuel Bentolila⁴⁶ o Ignacio Flórez Saborido⁴⁷. En no pocos casos,

⁴² En primer lugar véase su muy clarificador trabajo, DURÁN, Francisco, *Una visión liberal de las relaciones laborales*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2006. Monografías centrales del citado en: id., *El trabajo temporal: (la duración del contrato de trabajo)*, Madrid, Instituto de Estudios Sociales, 1980; y, id. & SÁEZ LARA, Carmen, *El papel de participación en las nuevas relaciones laborales*, Madrid, Civitas, 1997. Por lo demás, id., “Sindicatos y crisis económica”, *Civitas: Revista española de derecho del trabajo*, n° 8, (1981), pp. 429-442; id., “«Lanzamiento de nuevas actividades» y contratación temporal”, *Documentación Laboral*, n° 13, (1984), pp. 29-44; id., “Sindicatos y salida concertada de la crisis”, *Papeles de Economía Española*, n° 22, (1985), pp. 316-328; id., “El Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva”, *Relaciones Laborales*, n° 2, (1990), pp. 121-151; id., “El futuro del Derecho del Trabajo”, *Civitas. Revista española de derecho del trabajo*, n° 118, (2000), pp. 7-13; y, SÁEZ LARA, M^a Carme y id., “Mercado único, libre competencia y Derecho del trabajo” en id. y id. (coords.), *Unidad de mercado y relaciones laborales (XXV Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)*, Mairena de Aljarafe, Mergablum, 2007, pp. 15-56.

⁴³ SAGARDOY, Juan Antonio y LEÓN BLANCO, David, *El poder sindical en España*, Barcelona, Planeta, 1982; id., “Intrahistoria de un Proyecto de Ley. El estatuto de los Trabajadores”, *Relaciones Laborales*, n° 1, (1990), pp. 169-181; id. [et al.], *La reforma estructural del mercado de trabajo*, Madrid, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 1999; y id., *Los derechos fundamentales y el contrato de trabajo*, Madrid, Thomson Civitas, 2005.

⁴⁴ VIÑALS, José y JIMENO SERRANO, Juan Francisco, *El mercado de trabajo español y la unión económica y monetaria europea*, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1997; DOLADO, Juan J., FELGUEROSO, Florentino y id., “Explaining youth labor market problems in Spain: Crowding-Out, Institutions, or Technology shifts?”, *Documentos FEDEA*, n° 2000-09, (2000). Y en esta misma línea, GARCÍA-PÉREZ, José Ignacio, *The nineties in Spain: so much flexibility in the labor market?* Sevilla, Centra, 2002.

⁴⁵ MALO de MOLINA, José Luis, *Mercado de trabajo y estructura social: el caso español, 1963-1975*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Instituto de Estudios Laborales, 1984; id. (ed.), *El debate sobre la flexibilidad del mercado de trabajo*, Madrid, Fundación para la Investigación Económica y Social / Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1988. Véase también, id. y TOHARIA, Luis, *Costes de despido y creación de empleo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999.

⁴⁶ BENTOLILA, Samuel y DOLADO, Juan J., *La contratación temporal en España y sus efectos sobre la competitividad*, Madrid, Banco de España, 1993; id. “Labour flexibility and wages: Lessons from Spain”, *Economy Policy*, n° 18, (1994), pp. 54-99; id. y DOLADO, Juan J., “Spanish unemployment: The end of the wild ride?”, *Documentos FEDEA*, n° 2003-010, (2003). Y asimismo, DOLADO, Juan J., GARCÍA-SERRANO, Carlos F. y JIMENO, Juan F., “Drawing Lessons from the boom of temporary jobs in Spain”, *The Economic Journal*, n° 112, (2002), pp. 270-295. También habría que citarse su

procedentes de poderosos centros de difusión de ideas liberales –a modo de *think tank* como FEDEA en nuestro caso– y dentro de importantes consejos de redacción de revistas científicas. Autores que han tenido el “privilegio” –prácticamente indiscutido– de ocupar las primeras páginas sepias de la prensa económica. Habría que añadirse en este espacio también las aportaciones de otro destacado *economista laboral* de corte liberal como fue Luis Toharia, quien, en todo caso, siempre expresó hasta su fallecimiento sus temores y preocupaciones por la extensión sin límites de la contratación temporal⁴⁸.

En el segundo conjunto de iuslaboralistas, desde un enfoque netamente progresista estarían Fernando Valdés Dal-Ré⁴⁹, Jesús Lahera⁵⁰ –estos dos últimos autores nucleados en torno al sindicato socialista UGT– María Emilia Casas Baaamonde⁵¹ –un caso, en cualquier caso, de más complicada ubicación teniendo presente el tiempo histórico al que hagamos

contribución al amplio *informe* para el Centro de Estudios Monetarios y Financieros dependiente del Banco de España, en paralelo, al del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la colaboración tanto de Julio Segura como de Luis Toharia: BENTOLILA, Samuel, SEGURA, Julio y TOHARIA, Luis, *La contratación temporal en España*, Madrid, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 1991.

⁴⁷ FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal como medida de fomento del empleo en España: la creciente flexibilidad en el acceso al empleo*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1994; y, ALCAIDE CASTRO, Manuel y id., *Mercado de trabajo, reclutamiento y formación en España*, Madrid, Pirámide, 1996.

⁴⁸ Junto con los trabajos ya citados anteriormente, TOHARIA, Luis, ROCA JUSMET, Jordi y JUAN, Óscar de, *El desempleo en España. Tres ensayos críticos*, Cuenca, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996; FINA, Lluís y id., *Las causas del paro en España. Un punto de vista estructural*, Madrid, Fundación IESA, 1987; id. [et al.], *Empleo e inclusión social*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007; id. y CEBRIÁN, Inmaculada, *La temporalidad en el empleo: atrapamiento y trayectorias*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007. Pero sobre todo se ha de reseñar su trabajo como editor y coordinador en: id. y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, III vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985, vol. I, FINA, Lluís y ESPINA, Álvaro (coords.), *Oferta y demanda de empleo*; vol. II, FINA, Lluís y ESPINA, Álvaro (coords.), *Salarios y políticas de renta*; vol. III, TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (coords.), *El problema del paro*.

⁴⁹ VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Flexibilidad en el mercado de trabajo y ordenamiento laboral”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), pp. 302-315; id. “El sistema español de relaciones laborales: una aproximación”, *Relaciones Laborales*, nº 1-2, (1996), pp. 22-59; id. (coord.), *Sindicalismo y cambios sociales*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2004; id., *Las relaciones laborales en la Comunidad de Madrid*, Madrid, Consejo Económico y Social. Comunidad de Madrid, 2000; o, id. (dir.), *30 años de libertad sindical*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007; id. y LAHERA FORTEZA, Jesús, *La flexiseguridad laboral en España*, [Madrid], Fundación Alternativas, 2009. También se ha de destacar el interesante dossier monográfico coordinado por estos dos últimos juristas sobre la crisis del derecho del trabajo: id. y id. (coords.), *La transformación del Derecho del Trabajo*. Dossier monográfico, *Cuaderno de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XXV, nº 2, (2007).

⁵⁰ LAHERA FORTEZA, Jesús, *La carga de la prueba en el proceso de despido disciplinario*, Madrid, La Ley / Actualidad, 1996; VALDÉS-DALRÉ, Fernando y id., *La precariedad laboral en España: por un nuevo marco jurídico de la contratación temporal para la convergencia con el ordenamiento jurídico*, Granada, Comares, 2004; id., “Factores jurídicos de la precariedad en España” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la..., op.cit.*, pp. 205-220.

⁵¹ CASAS BAAMONDE, Mª Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y contractualismo en el Derecho del Trabajo español”, *Relaciones Laborales*, nº 23, (1987), pp. 7-36; id. y VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Diversidad y precariedad de la contratación temporal en España”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1990), pp. 240-258; id., BAYLOS, Antonio y APARICIO TOVAR, Joaquín, *Legislación de huelga*, Madrid, Tecnos, 1992. En similar línea consúltense los trabajos de: PÉREZ REY, Joaquín, *Estabilidad en el empleo*, Madrid, Trotta, 2004; y, MARTÍNEZ EMPERADOR, Rafael, *Estabilidad en el empleo y contratación temporal*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1985.

referencia– Manuel Carlos Palomeque⁵², Miguel Rodríguez-Piñero⁵³, así como también –en cierta medida– a Luis Enrique de la Villa –cuyas publicaciones, principalmente, en los primeros años ochenta constituyen referencias centrales–⁵⁴. Por último, habría que citar tanto a Antonio Baylos⁵⁵ –de cuya valía ya se ha dejado constancia– José Luis Monereo⁵⁶ y Joaquín Aparicio Tovar⁵⁷, dentro de una escuela más estrechamente relacionada con el movimiento obrero y sindical así como más vinculado a las propias Comisiones Obreras. Referencias a las que se podrían citar otras tantas, y que se convirtieron en centrales a lo largo de esta investigación⁵⁸.

Asimismo de enorme relevancia han resultado aquellos trabajos de una perspectiva jurisprudencial en relación a la contratación temporal. En concreto, nos referimos a los trabajos de Icíar Alzaga Ruiz –*Contratación laboral temporal: un estudio jurisprudencial*⁵⁹– y de Jesús Mercader Uguina –*La contratación temporal en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*⁶⁰– a sumarse al trabajo colectivo coordinado por Fermín Rodríguez-Sañudo y Fernando Elorza Guerrero –*Veinte años de jurisprudencia laboral y social del Tribunal Constitucional*⁶¹–.

⁵² PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos, “Un compañero de viaje histórico del Derecho del Trabajo: la crisis económica”, *Revista de Política Social*, nº 143, (1984); id., *La política de empleo en España (1977-1982): un quinquenio de política centrista ante la crisis económica*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Instituto de Estudios Laborales, 1985; id., *Los derechos laborales en la Constitución española*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991; id. *Derecho sindical español*, 5ª ed., Madrid, Tecnos, 1994.

⁵³ RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la nueva legislación laboral. Ley reformada del Estatuto de los Trabajadores, Ley de Protección por Desempleo y Decretos de desarrollo*, Madrid, Tecnos, 1985; id. “La Ley de Relaciones Laborales, diez años después”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1986), pp. 27-32; id., “Flexibilidad: ¿un debate interesante o un debate interesado?”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1987), pp. 14-18; id., “Diez años de Estatuto de los Trabajadores”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1990), pp. 37-44.

⁵⁴ VILLA, Luis Enrique de la y DESDENTADO, Aurelio, *La amnistía laboral: una crítica política y jurídica*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1978; id., *Panorama de las relaciones laborales en España*, Madrid, Tecnos, 1982; id. y GARCÍA BECEDAS, Gabriel, *Leyes sindicales*, Madrid, Akal, 1982; id., *Panorama de las relaciones laborales en España*, Madrid, Tecnos, 1983; id., *La formación histórica del derecho español de trabajo*, Granada, Comares, 2003.

⁵⁵ Junto con lo citado en la *Presentación, nota 141*, BAYLOS, Antonio, “Trabajo temporal y no discriminación”, *Relaciones Laborales*, vol. II, (1987), pp. 429-439; id., “Sistema de empresa y reforma del mercado de trabajo”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, nº 5, (1994), pp. 140-156; así como una interesante recopilación de sus propios trabajos en, id., *Las relaciones laborales en España desde la Constitución hasta nuestros días (1978-2003)*, Madrid, Fundación Sindical de Estudios, 2003.

⁵⁶ MONEREO PÉREZ, José Luis, *Las reconversiones industriales en el derecho del trabajo*, Granada, Universidad de Granada, 1988; id., (coord.), *La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral (XII Jornadas Universitarias andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)*, Granada, Universidad de Granada, 1996.

⁵⁷ APARICIO TOVAR, Joaquín, *Introducción al derecho social de la Unión Europea*, Albacete, Bomarzo, 2005; id. (dir.), *Diálogos sobre política sindical*, Madrid, GPS-Madrid, 2008.

⁵⁸ ALONSO OLEA, Manuel, *Derecho del Trabajo*. Madrid, Edit. Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección Publicaciones, 1978; y también id., *De la servidumbre al contrato de trabajo*, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1987.

⁵⁹ ALZAGA RUIZ, Icíar, *Contratación laboral temporal: un estudio jurisprudencial*, Madrid, EDERSA, 2000.

⁶⁰ MERCADER UGUINA, Jesús R., *La contratación temporal en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999.

⁶¹ RODRÍGUEZ-SAÑUDO, Fermín y ELORZA GUERERO, Fernando (coord.), *Veinte años de jurisprudencia laboral y social del Tribunal Constitucional (XIX Jornadas Universitarias Andaluzas del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)*, Madrid, Tecnos, 2001. Consúltese también aquí: DURÁN,

2.2.3. Estudios y aproximaciones a la concertación social, la negociación colectiva, la política de rentas y las reformas del mercado de trabajo

A pesar de la aparente neutralidad de la denominación de la “concertación social” – concepto creado durante la época socialista por los propios dirigentes gubernamentales– desde una perspectiva histórica este término tiene claras connotaciones políticas-ideológicas al igual que sucede con el concepto de “paz social”.

Puede parecer lo anterior un asunto menor. No lo es. De hecho, cuando se aborda en profundidad el estudio de los diferentes procesos de concertación social, los mismos no invitan, siendo precisos, a la imagen edulcorada que se ha transmitido acerca de los mismos. No sólo es que un alto número de negociaciones concluyeran en sonados fracasos cuando no en acuerdos de mínimos, tras largas batallas que se prolongarían durante meses, sino que además en su mayor parte no frenarían la conflictividad social, a lo que se añadiría que sus efectos socioeconómicos serían limitados. Todavía más, pues no se conoce caso alguno en nuestra reciente historia que un acuerdo social trajera *paz social* en términos absolutos.

Al mismo tiempo, aquellos procesos de concertación, tanto durante los años de la transición a la democracia como durante los gobiernos socialistas, se haría, en base, a la exclusión de las Comisiones Obreras –excepto en la negociación del ANE, y en unas circunstancias tan especiales como el *shock* del 23-F– a través de una alianza de mutuos intereses entre UGT y la CEOE. Una política de alianzas no exenta de riesgos y de limitaciones, pues, como ha recordado Mariano Guindal, solamente “CC.OO [...] era de verdad el sindicato que tenía la fuerza para imponer la paz social”⁶².

En la situación descrita mucho ha tenido que ver que en lo referente a la concertación social y las reformas laborales –principal aunque no únicamente– como en las últimas décadas se haya asistido a todo un conjunto de conmemoraciones sobre el Estatuto de los Trabajadores y otros *pactos sociales*. Conmemoraciones menores –social y mediáticamente– frente a otro tipo de eventos, pero que enlazaron con el relato del “modelo canónico español” de la transición a la democracia. Fuera en forma de libros, en forma de exposiciones y en otros soportes, tenderían a reforzar la visión hegemónica sobre nuestro pasado reciente⁶³.

A la hora de adentrarse en su estudio resulta en no pocos casos complicado diferenciar – de forma estricta– los que serían los procesos de concertación social, de los procesos de negociación colectiva y de políticas de rentas, y claro está, los relacionados con las reformas laborales. En ocasiones, coincidirían todos los procesos a la vez. En otros casos, o bien se estaba ante una negociación colectiva y en otras exclusivamente ante una reforma laboral, como se examinará detenidamente en nuestro estudio de caso. Lo anterior, ha conllevado no pocas dificultades. Si bien no faltan las referencias, otra cuestión diferente son las escasas investigaciones monográficas al respecto. Así pues, de nuevo, se ha tenido que rastrear en múltiples referencias de cara a ir seleccionando no pocas claves explicativas y datos históricos de interés⁶⁴.

Francisco, *El derecho del trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.

⁶² GUINDAL, Mariano, *El declive de los dioses. Los secretos de la transición económica española desvelados por un testigo de excepción*, Barcelona, Planeta, 2011 [con la colaboración de Mar Díaz-Varela], p. 180.

⁶³ Junto con las obras citadas en la *Presentación*, nota 147, véase también: MINISTERIO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, *20 años de concertación y diálogo social en España: catálogo exposición gráfica*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1998.

⁶⁴ COSCUBIELA, Joan, *Diálogo y concertación social en la España de las autonomías*, Madrid, GPS, 2006; MORENO, Agustín, “Breve historia del Estatuto de los Trabajadores, de sus reformas y consecuencias. El déficit laboral en España” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *La clase trabajadora...*, op.cit., pp. 221-236. A ello se deben sumar otras dos obras claves que evitaron el ‘clásico

Las principales aportaciones han procedido de muy diferentes campos académicos. Principalmente, desde el derecho laboral y las ciencias políticas, aunque también se puedan localizar bibliografía de primer orden desde la sociología y otras ramas de saber, aunque en rara ocasión desde el conocimiento histórico⁶⁵. Ello sin descartar los propios testimonios políticos y sindicales.

Pese a lo anterior, y a diferencia de lo hasta ahora dicho, en este caso sí se pueden destacar un conjunto de obras de referencia, que desde sus diferentes ángulos de interés, han trazado visiones globales en torno a esta compleja cuestión. Por ejemplo: *La concertación social en la democracia española: crónica de un difícil intercambio* de Alberto Oliet Palá, catedrático en Ciencias Políticas y de la Administración y a su vez Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social⁶⁶. Una monografía que constituye, a día de hoy, la principal referencia al respecto. Bien estructurado, bien documentado y sobre todo bien escrito –por más que se pueda discutir enfoques y conclusiones– constituye el más serio intento de ofrecer una radiografía completa. La tesis doctoral de Emma Cerviño –también desde la Ciencia Política de la mano de José María Maravall– ofreció en su momento un completo análisis de las posiciones político-estratégicas que los dos grandes sindicatos tomarían respecto a las sucesivas reformas flexibilizadoras. A pesar del claro *sesgo político* de la autora, constituye un aporte central⁶⁷. Como también lo constituye, sin ir más lejos, una de las obras centrales del Catedrático de Economía, Jordi Roca Jusmet, *Pactos sociales y política de rentas*, quien además introduciría en su estudio una perspectiva comparativa internacional⁶⁸. En esta misma línea, se puede y se debe situar una de las muchas obras de Albert Recio –*Capitalismo y formas de contratación laboral*⁶⁹–. A lo anterior, igualmente, ha de sumarse la tesis doctoral de Ignacio Rodríguez

sectarismo’: ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos y patronal en España*, Madrid, Siglo XXI, 1988; y el segundo volumen de la colección de estudios –en base, principalmente, a testimonios orales– dirigido por Salvador Aguilar, y que llevaría por título: GONZÁLEZ CALVET, Josep, *Els contextos de l'acció sindical, 1976-1988*, Barcelona, Fundació Jaume Bofill / Fundació Volkswagen, 1990, vol. II. En las anteriores obras se pueden rastrear numerosos testimonios de dirigentes sindicales –principalmente de la UGT– y de la patronal. No obstante, las memorias personales y/o testimonios acerca de los anteriores procesos, no han sido tan numerosos. Entre los más valiosos: CAMACHO, Marcelino, *Memorias: confieso que he luchado*, Madrid, Temas de Hoy, 1990; y de quien sería el *gran estratega ugetista*, ZUFIAUR, José M^a, “El sindicalismo español en la transición y la crisis”, *Papeles de Economía Española*, n° 22, (1985), pp. 202-234.

⁶⁵ Una excepción en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La primera etapa de la política laboral del Gobierno Socialista (1982-1992). La reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984. Algunas hipótesis de trabajo”, *Hispania Nova*, n° 3, (2003), pp. 203-228.

⁶⁶ OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social en la democracia española: crónica de un difícil intercambio*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004; id., “Neocorporativismo, Estado y Administración laboral”, *Revista de Trabajo*, n° 95, (1989), pp. 31-82.

⁶⁷ CERVINO CUERVA, Emma, *Políticas de representación...*, *op.cit.*.

⁶⁸ ROCA JUSMET, Jordi, *Pactos sociales y políticas de rentas: el debate internacional y la experiencia española (1977-1988)*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993 [*Pacte social i política de rendes: debat internacional i experiència a l'Estat espanyol (1977-1988)*, Vic, Eumo, 1991]. Junto a otras referencias ya citadas, también: id., “La distribución de la renta entre las clases sociales” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, pp. 597-645; id., “Evolución de los salarios y evolución del discurso «oficial» sobre los salarios” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, pp. 197-222.

⁶⁹ RECIO, Albert, *Capitalismo y formas de contratación laboral*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988; id. “Flexibilidad laboral y desempleo en España (reflexiones al filo de la reforma laboral”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, n° 5, (1994), pp. 57-74; y id., “Capitalismo español: La inevitable crisis de un modelo insostenible”, *Revista de Economía Crítica*, n° 9, (2010), pp. 198-222.

Medina –*Política económica, distribución de la renta y mercado de trabajo*⁷⁰– así como el temprano trabajo de Francisco Parra Luna –*Políticas de empleo y bienestar social*⁷¹–. Referencias en donde también cabría incluir la tesis doctoral en marcha de de Jorge Sola Espinosa⁷².

No obstante, ha sido desde el mismo derecho donde mayor atención se ha prestado, como no podía ser de otra forma. Enfocadas a los cambios legislativos y sus sucesivas lecturas laborales a la par que políticas, las referencias disponibles se han convertido en un soporte central en esta investigación. Junto con los trabajos ya citados de de Miguel Rodríguez Piñeiro⁷³ y Luis Enrique de la Villa⁷⁴, se ha de mencionar necesariamente las obra colectivas de Antonio Ojeda Avilés⁷⁵, así como las monografías de Miguel Ángel Solans Latre⁷⁶, María Nieves Moreno Vida⁷⁷ y de nuevo las de José Luis Monereo⁷⁸ y Federico Durán López⁷⁹.

A la bibliografía ya citada se suman decenas de aportaciones tanto en libros colectivos como en artículos científicos, que han venido a abundar en el modelo neocorporativista español⁸⁰. Un modelo neocorporativista repleto de singularidades específicas producto de nuestro pasado reciente, y que han incidido considerablemente en el propio del modelo español de relaciones laborales. Desde los primeros trabajos teóricos publicados en los ochenta como los

⁷⁰ RODRÍGUEZ DE MEDINA, Ignacio, *Política económica, distribución de la renta y mercado de trabajo: España, 1982-1993*, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 1996.

⁷¹ PARRA LUNA, Francisco, *Políticas de empleo y bienestar social: el caso español 1982-87*, Madrid, EUDEMA, 1988.

⁷² SOLA ESPINOSA, Jorge, “La desregulación política del mercado de trabajo en España (1984-1997). Un programa de investigación”, *Revista de Economía Crítica*, nº 9, (2010), pp. 4-30. En este sentido, véase también: GÓMEZ VICENTE, M^a Teresa, SÁNCHEZ y SÁNCHEZ-AMAYA, M^a Isabel, “La desregulación del mercado de trabajo español en el período 1984-1995 y sus efectos sobre el empleo”, *Estudios de Economía Aplicada*, nº 8, (1997), pp. 109-140.

⁷³ Véase la nota 53.

⁷⁴ Véase la nota 54.

⁷⁵ OJEDA AVILÉS, Antonio (dir. / coord.), *La concertación social tras la crisis*, Barcelona, Ariel, 1990. Y asimismo: id., *Los contratos de trabajo temporales*, Madrid, Iustel, 2006. Téngase presente aquí también la aportación de, SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente, *Los contratos temporales*, Navarra, Thomson Aranzadi [2004].

⁷⁶ SOLANS LATRE, Miguel Ángel, *Concertación social y otras formas de neocorporativismo en España y la Comunidad Europea*, Madrid, Tecnos, 1995.

⁷⁷ MORENO VIDA, M^a Nieves, *Los pactos sociales en el derecho del Trabajo*, Granada, Universidad de Granada, 1989.

⁷⁸ MONEREO PÉREZ, José Luis, *Concertación y diálogo social*, Valladolid, Lex Nova, 1999.

⁷⁹ DURÁN LÓPEZ, Federico (coord.), *El diálogo social y su institucionalización en España e Iberoamérica*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998. Consúltase aquí también, PÉREZ INFANTE, José Ignacio, “La concentración y el diálogo social en España, 1977-2007”, *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, nº 81, (2009), pp. 41-70.

⁸⁰ BAYLOS, Antonio, “Experiencias y modelos de concertación social” en GUITTON, Christophe, REYNAUD, Emmanuèle y MARUANI, Margaret (coords.), *Debates sobre el empleo*, III vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991-1992, vol. III, pp. 177-198; TORRE PRADOS, Isabel de la, “La concertación social en el contexto de una sociedad corporativista: el caso de España”, *Revista de Trabajo*, nº 91, (1988), pp. 117-135; ORTIZ LALLANA, M^a del Carmen, “Planteamientos y perspectivas para una política de concertación social en España (una aproximación a los nuevos objetivos y métodos)”, *Revista de Trabajo*, nº 95, (1989), pp. 7-23; ARASSANZ DÍAZ, Juan y LÓPEZ ANDREU, Martí, “La concertación social en España (1976-2004): análisis de la construcción socio-histórica de los actores sociales” en *Relaciones Laborales, formación y fiscalidad*. Dossier monográfico, *Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo*, nº 6, (2005), pp. 183-200. Finalmente desde el Derecho del Trabajo, OTXOA, Isabel, *El recorte de derechos en las reformas laborales*, Bilbao, Manu Robles / Arangiz Institutua, 2007.

de Carlota Solé⁸¹, Fausto Miguélez⁸² o el de Salvador Giner⁸³ y Manuel Pérez Yruela o años más tarde la visión crítica de José Martínez Alier y Jordi Roca ya citados⁸⁴; se cuenta en adelante con una considerable cantidad de trabajos rigurosos. En este sentido, en primer lugar, habría que destacar los de Sebastián Royo. Hoy día pocos conocidos, debido al mero hecho de estar publicado en inglés. En todo caso, insistimos, la que sería su tesis doctoral, *Social democracy and the collapse of concentration in Spain*, resulta del todo clarificadora así como un tiempo más tarde su trabajo comparado entre España y Portugal⁸⁵. A lo anterior, habría que sumar trabajos tan dispares como el Lucinio Hernández Marcos⁸⁶ o tesis doctorales como las de Joan Trullén i Thomas –*Fundamentos económicos de la transición política española*–⁸⁷.

Por lo demás, y en paralelo a la transición democrática sindical, se comenzaría a cimentar el largo proceso de formación de la actual estructura de negociación colectiva. He aquí uno de los principales campos de batalla políticos, económicos pero ante todo sindicales, y uno de los aspectos que más conflictividad socio-laboral generaría, a la postre, durante la década de los ochenta y noventa. Una cuestión, que hasta el momento, apenas ha acaparado algún análisis histórico. Por tanto, de nuevo, se ha de recurrir a lo estudiado, en términos básicos, por los juristas y los economistas. Junto con ya obras referenciadas con anterioridad, en primer término, se ha de destacar la valiosa como abundante información que ha venido proporcionando periódicamente la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, así como los diferentes informes elaborados y publicados por el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales⁸⁸. Por lo demás, referencias centrales para entender la estructura así como la dinámica de la negociación colectiva en España –con una pluralidad de interpretaciones chocantes entre sí– se pueden localizar en los estudios de Manuel Rodríguez-Piñero⁸⁹, Jesús R. Mercader

⁸¹ SOLÉ, Carlota, “El debate corporativismo-neocorporativismo”, *Revista de Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 26, (1984), pp. 9-28.

⁸² MIGUÉLEZ, Fausto, “Corporativismo y relaciones laborales en Europa”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 30, (1985), pp. 149-178.

⁸³ GINER, Salvador y PÉREZ YRUELA, Manuel, “Corporativismo: el estado de la cuestión”, *Revista de Investigaciones Sociológicas*, nº 31, (1985), pp. 9-46.

⁸⁴ MARTÍNEZ ALIER, José y ROCA JUSMET, Jordi, “Economía política del...”, *op.cit.*.

⁸⁵ ROYO, Sebastián, *Social democracy and the collapse of concentration in Spain*, Tesis Doctoral, Boston University, 1998; id., *A new century of corporatism?: Corporatism in Southern Europe. Spain and Portugal in comparative perspective*, Westport, Praeger, 2002. En esta línea, véase la aportación de, HAMMAN, Kerstin, *The politics of industrial relations: labor unions in Spain*, New York, Routledge, 2012.

⁸⁶ HERNÁNDEZ MARCOS, Lucinio, *El diálogo social: políticas de concertación social en España: neocorporativismo y diálogo social*, [Madrid], Bubok, [2002].

⁸⁷ TRULLÉN i THOMAS, Joan, *Fundamentos económicos de la transición política española. La política económica de los Acuerdos de la Moncloa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

⁸⁸ Sobre este aspecto nos remitimos a la bibliografía apuntada que se apuntará en el Capítulo 8, nota 75. Aunque aquí se haya de destacar, primero, SALA FRANCO, Tomás, “La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos” en *Panorama actual de la negociación colectiva*. Dossier monográfico, *Revista de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 68, (2007), pp. 171-180. Por lo demás: MOLERO MANGLANO, Carlos, *Fundamentos de las relaciones laborales colectivas*, Madrid, Reus, 1986; VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo, *Los acuerdos marco sobre la estructura de la negociación colectiva: naturaleza jurídica, eficacia, contenido*, Granada, Comares, 1998; y, CORREA CARRASCO, Manuel, *La negociación colectiva como fuente del derecho del trabajo*, Madrid, Universidad Carlos III / Boletín Oficial del Estado, 1997.

⁸⁹ RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel [et al.], *Negociación colectiva: presente y futuro*, Barcelona, Gestió 2000, 1989.

Urquina⁹⁰, Lluís Fina, Francisco González de Lena y José Pérez Infante⁹¹, Joaquín García Murcia⁹², de Fernando Valdés Dal-Ré⁹³, Salvador del Rey Guanter⁹⁴, y de forma destacada en los estudios dirigidos y coordinados por Ricardo Escudero⁹⁵, entre otros muchos. Trabajos a los que deben sumarse los elaborados por los propios sindicatos y economistas vinculados a los mismos, como en el caso de los de Jorge Aragón Medina y otros⁹⁶.

2.2.4. El mundo del trabajo y las relaciones laborales: un balance generalista

La bibliografía en torno al mundo del trabajo o las denominadas relaciones laborales – aunque en este trabajo se mantendrá, o bien, el primer concepto, o bien, directamente, el del mercado de trabajo – es a día de hoy inabarcable a nivel nacional como internacional. Además de los trabajos ya anunciados en la *Presentación*⁹⁷ y otras referencias básicas centrales –por ejemplo, los trabajos marxistas de Paul Singer⁹⁸ o Hyman Richard⁹⁹, a sumar a lo aportado en obras como las de Clauss Offe¹⁰⁰ o las de André Gorz¹⁰¹ así como el clásico manual de Sabine

⁹⁰ MERCADER URGINA, Jesús R., *Estructura de la negociación colectiva y relaciones entre convenios*, Madrid, Civitas / Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1994; y, id. (dir.), *El contenido económico de la negociación colectiva*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.

⁹¹ FINA, Lluís, GONZÁLEZ DE LENA, Francisco y PÉREZ INFANTE, José Ignacio, *Negociación colectiva y salarios en España*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2001.

⁹² GARCÍA MURCIA, Joaquín (dir.), *Condiciones de empleo y de trabajo en la negociación colectiva: estudio de los convenios colectivos de sector (1994-1996)*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.

⁹³ VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, *Relaciones laborales, negociación colectiva y pluralismo social*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996.

⁹⁴ REY GUANTER, Salvador del, *Negociación colectiva y paz laboral*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984.

⁹⁵ ESCUDERO, Ricardo (coords.), *La negociación colectiva en España: una visión cualitativa*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004; OBSERVATORIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA [ESCUDERO, Rafael (coord.)], *La negociación colectiva en España: una mirada crítica*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006.

⁹⁶ ARAGÓN MEDINA, Jorge y GUTIÉRREZ BENITO, Eduardo, “La negociación colectiva y la formación de los salarios en España”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, nº 9, (1996), pp. 77-99; ROCHA SÁNCHEZ, Fernando, COLADO LEÓN, Auxiliadora y id., *El papel de la negociación colectiva en la regulación de la contratación temporal*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006; ROCHA SÁNCHEZ, Fernando, id. y CRUCES AGUILERA, Jesús, *Cambios productivos y empleo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008.

⁹⁷ CASTEL, Robert, *Las metamorfosis de...*, op.cit.; SENNETT, Richard, *La corrosión del...*, op.cit.; BECK, Ulrich, *Un nuevo mundo...*, op.cit..

⁹⁸ SINGER, Paul, *Economía política del Trabajo: Elemento para un análisis histórico-estructural del empleo y de la fuerza de trabajo en el desarrollo capitalista*, México, Siglo XXI, 1980. Véase también: HAMERMESH, Daniel y REES, Albert, *Economía del trabajo y de los salarios*, Madrid, Alianza, 1984.

⁹⁹ HYMAN, Richard, *Relaciones industriales. Una introducción marxista*, Madrid, Blume, 1981.

¹⁰⁰ OFFE, Claus, *La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro*, Madrid, Alianza, 1984; id. [et al.], *Capitalismo y estado*, Madrid, Revolución, 1985.

¹⁰¹ GORZ, André, *Metamorfosis del trabajo: búsqueda del sentido. Crítica a la razón económica*, Madrid, Fundación Sistema, 1997; junto uno de sus trabajos básicos, id., *Adiós al proletariado. Más allá del socialismo*, Barcelona, Ed. 2001 [1981].

Erbes-Seguin y Pierre Ollier¹⁰²— se ha de prestar atención a no pocos debates que surgieron desde finales de los setenta y cuyas repercusiones se prolongaron durante los siguientes años. Debates, que nos permiten acercarnos a la configuración de la nueva realidad laboral al calor de la crisis del modelo fordista —tanto en su dimensión económica como social—. Pero no sólo, pues a su vez los mismos aportan las claves interpretativas básicas a la hora de examinar los procesos de dualización y segmentación que van a caracterizar a las relaciones capital-trabajo en la España del último tercio del siglo XX¹⁰³.

Determinantes, en este caso, han sido los estudios de los autores anglosajones, siempre pioneros en este campo. Aunque las obras de sociólogos y economistas españoles se han destacado por su consistencia teórica y por su alta calidad, su aportación al debate final internacional ha quedado bastante reducida, al igual que ha sucedido en otros campos del conocimiento.

El impacto que va a producir en la relaciones capital-trabajo la instalación y consolidación del nuevo modelo de producción —denominado, o bien *flexible*, o bien, *postfordista*— cambiaría radicalmente los tradicionales enfoques teóricos procedentes de la segunda mitad del siglo XX. Dos han sido las principales escuelas: *los institucionalistas* y *los regulacionistas*. A continuación, y de forma sintética, se exponen sus principales tesis respectivamente.

Hablar de los *institucionalistas* supone referirnos al enfoque netamente liberal. Hoy día convertida en la literatura mayoritaria dentro de la academia. Su planteamiento original residió en el siguiente planteo: a la hora de examinar las nuevas estrategias empresariales tras la quiebra del modelo fordista, observaría como los nuevos modelos de producción van a sustentarse, en adelante, en torno a la deslocalización, la fragmentación productiva, y en una vuelta al pasado en lo referente a los modelos de gestión. Así pues, nos encontramos ante un modelo calificado como de *especialización flexible*, tal y como lo describirían Michel Piore y Charles Sabel en una de sus obras centrales: *La segunda ruptura industrial*¹⁰⁴. Una obra, por cierto, que tardaría más de cinco años en ser publicada en España¹⁰⁵. Para estos mismos autores, la propia crisis del fordismo estaría determinada por la transformación del mercado que afectaría a las necesidades externas de las empresas en un panorama cada vez más internacionalizado.

A partir de ahí, las estrategias empresariales se modificarían, iniciándose los procesos de deslocalización empresarial con el objetivo de reducir costes de todo tipo, lo que a su vez llevaría a la fragmentación del proceso productivo de cara a optimizar costes y recursos. La lógica liberal de la flexibilidad, por tanto, se convertiría en el instrumento de cara a la adaptación de todos y cada uno de los nuevos ciclos productivos. Dados por superados los viejos modelos de producción y el modelo de relaciones laborales *ad hoc*; estos mismos autores insistirán como frente a la idea del tradicional conflicto obrero dentro de las empresas —que intencionadamente asocian como una característica intrínseca del modelo fordista— se hace necesario, a partir de entonces, reclamar una *necesaria cooperación* entre empleadores y empleados, a través de un discurso —utópico en extremo— con el que se pretende superar la concepción clasista de la mano de obra.

¹⁰² ERBES-SEGUIN, Sabine y OLLIER, Pierre, *Sociología del trabajo*, Madrid, Pirámide, 1972. Para el caso español de forma específica nos remitimos a, BLANCH RIBAS, Josep M^a (coord.), *Teoría de las relaciones laborales. Fundamentos*, Barcelona, UOC, 2003.

¹⁰³ Véase la *Presentación*, nota 82.

¹⁰⁴ PIORE, Michel y SABEL, Charles, *La segunda ruptura industrial*, Madrid, Alianza, 1990. Véase también, SABEL, Charles, *Trabajo y política. La división del trabajo en la industria*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986; y, id., “Flexible Specialisation and the Re-emergence of Regional Economies” en HIRST, Paul y ZEITLIN, Jhonathan (comps.), *Reversing Industrial Decline?* Oxford, Berg Publishers, 1989.

¹⁰⁵ PIORE, Michel y SABEL, Charles, *The Second Industrial Divide: Possibilities for prosperity*, New York, Basic Books, 1984 [traducción de María Esther Rabasco y Luis Toharia].

En lo que respecta a la segunda escuela, la *regulacionista*, se encuentra claramente influenciada a su vez por la escuela (neo)marxista. Su explicación difiere considerablemente de la anterior. El nodo de su explicación de la crisis del modelo fordista residiría en los problemas por los que atraviesa el sistema capitalista, a la hora de recuperar las tasas de rentabilidad anteriores a la crisis de los años setenta. A partir de ahí, las empresas se verían obligadas a adaptarse a las nuevas condiciones de producción que se van imponiendo desde una perspectiva liberal y en donde la flexibilización interna y externa adquiere cada vez mayor peso. Entre los autores defensores de este postulado se deben citar Michael Aglietta¹⁰⁶, Robert Boyer¹⁰⁷ y Benjamin Coriat¹⁰⁸, entre otros. Para los mismos antes que un nuevo modelo de producción, se estaría ante una etapa denominada *post-fordismo*, lo que, en cualquier caso, constituirá una auténtica “revolución” en el uso de la mano de obra.

Ambas lecturas nos sitúan ante la conocida crisis de la sociedad industrial sobre la que se han escrito decenas de investigaciones¹⁰⁹. Más allá de sus dispares enfoques, las mismas coinciden en otorgar un peso decisivo a un creciente determinismo tecnológico así como a la necesidad de incrementar la flexibilidad interna y externa en los procesos productivos. Así pues, y como destacaría en su momento, Xavier Coller:

«La flexibilidad, que es vista por las dos corrientes como el puente que conecta fordismo y postfordismo, es concebido como un fenómeno no problemático. De esta manera, la supuesta transformación del fordismo en postfordismo es vista como un proceso armónico ajeno a tensiones sociolaborales»¹¹⁰.

¹⁰⁶ AGLIETTA, Michel, *Regulación y crisis del capitalismo: la experiencia de los Estados Unidos*, Madrid, Siglo XXI, 1979. Véase aquí también, GAMBINO, Ferruccio, “A Critique of the Fordism of the Regulation School”, *Wildcat-Zirkular*, nº 28/29, (1996), pp. 139-160. Y más recientemente, KOCH, Max, *Roads to Post-Fordism. Labour Markets and Social Structures in Europe*, Aldershot, Ashgate, 2006.

¹⁰⁷ BOYER, Robert, *Regulation School: A Critical Introduction*, New York, Columbia University Press, 1990 [Teoría de la regulación. Un análisis crítico, Valencia, Alfons el Magnàmin, 1992]; id. y FREYSSINET, Michel, *Los modelos productivos*, Madrid, Fundamentos, 2003.

¹⁰⁸ CORIAT, Benjamin, *El taller y el robot. Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era electrónica*, Madrid, Siglo XXI, 1993. De este último véase, id., “Social-institutional changes in the post-Fordist era” en id., PETIT, Pascal y SCHMÉDER, Geneviève (eds.), *The Hardship of Nations. Exploring the Paths of Modern Capitalism*, Glos / Massachusetts, Edward Elgar Publishing, 2006, pp. 103-122.

¹⁰⁹ La lectura hegemónica liberal ampliamente publicitada en medio académicos y políticos anglosajones giraría en torno a la obra de, BELL, Daniel, *El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social*, Madrid, Alianza, 1976. Del mismo autor, id., *El fin de las ideologías: sobre el agotamiento de las ideas políticas en los años cincuenta*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992. Sobre su papel académico-publicista, véase la necrológica publicada en su momento por, PETRAS, James, “El Imperio pierde un publicista: epitafio de un ideólogo”, *Rebelión*, 25 de febrero de 2011. Por lo demás, y desde otros ángulos, primero, la también obra clásica de, TOURAINE, Alain, *La sociedad post-industrial*, 3ª ed., Barcelona, Ariel, 1973; y asimismo, COHEN, Daniel, *Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial*, Buenos Aires, Katz, 2007; y también, SANCHIS, Enric, *Trabajo y paro en la sociedad postindustrial*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2008. En cualquier caso, ha de destacarse la muy valiosa obra de, ESPING-ANDERSEN, Gøsta, *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*, Madrid, Ariel, 2004; e igualmente, id., *Los tres mundos del estado de bienestar*, València, Edicions Alfons El Magnàmin, 1993. Por último, THERBORN, Göran, *Por que en algunos países hay más paro que en otros: la extraña paradoja del crecimiento y el desempleo*, València, Edicions Alfons el Magnàmin, 1989.

¹¹⁰ COLLER, Xavier, *La empresa flexible...*, op.cit., p. 18. El propio autor aporta una definición de *fordismo* que se puede dar por válida para nuestros objetivos: «[U]n modelo social de capitalismo estabilizado en que la economía se organiza y se regula por un consumo masivo que es abastecido por una forma de producir en masa. El nombre ‘fordismo’, pues, se refiere a una forma de acumulación basada en la conexión entre producción y consumo». Ibídem, pp. 18-19. Véase, LETAMENDIA, Francisco, *Estructura política del mundo del trabajo: fordismo y posfordismo*, Madrid, Tecnos, 2009.

El impacto académico de la escuela institucionalista tendrá el consiguiente correlato en la definición de las políticas gubernamentales laborales, en torno a la flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo. De nuevo, política y academia andarán en paralelo de forma más frecuente de lo que se ha presupuesto generalmente. Por este mismo camino, la lógica internacional mayoritaria que se va a imponer, a través de las diferentes legislaciones internas de carácter nacional, será la pérdida de la capacidad de negociación del trabajo frente al acrecentamiento de la discrecionalidad empresarial, quien verá incrementado su control sobre las propias condiciones de trabajo y laborales.

La traslación del citado debate a nuestra literatura ha dado a todo tipo de estudios teóricos y prácticos. Primero, en torno a las singularidades del propio fordismo español –las obras de José Babiano resultan aquí especialmente atractivas por su enfoque histórico¹¹¹–; segundo en torno al cambio de significado del propio concepto de trabajo, y su progresiva conversión en empleo, han de tenerse presente además de los trabajos ya citados de Juan José del Castillo¹¹², Luis Enrique Alonso¹¹³, Andrés Bilbao¹¹⁴, Rafael Díaz-Salazar¹¹⁵ o el propio Pablo López Calle¹¹⁶, los de Margaret Maruani¹¹⁷, Modesto Escobar¹¹⁸, Carlos Prieto¹¹⁹, Enric Sanchis¹²⁰... entre otros muchos. Obras en su mayor parte deudoras de las tesis de Robert Castel

¹¹¹ BABIANO, José, *Emigrantes, cronómetros, y huelgas: un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977)*, Madrid, Fundación 1º de Mayo / Siglo XXI, 1995; id., “Las peculiaridades del fordismo español”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, nº 3, (1993), pp. 77-94.

¹¹² CASTILLO, Juan José, “El significado del...”, *op.cit.*; id., (ed.), *El trabajo del...*, *op.cit.*; id. y PRIETO, Carlos, *Condiciones de trabajo. Un enfoque renovador de la sociología del trabajo*, Madrid, CIS, 1990 [1983]; y más concretamente, id., *La soledad del trabajador globalizado. Memoria, presente y futuro*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008.

¹¹³ Junto con la citada obra de, ALONSO, Luis Enrique, *Trabajo y posmodernidad...*, *op.cit.*; id. y LASIERRA, José Manuel, “¿El fin del trabajo o el trabajo sin fin? Una revisión crítica de las tesis de Jeremy Rifkin”, *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, nº 6, (1998), pp. 13-34; id., *Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial*, Madrid, Trotta, 1999.

¹¹⁴ A sumar a los trabajos ya citados en la *Presentación*, nota 32 y nota 53; BILBAO, Andrés, *El empleo precario. Seguridad de la economía e inseguridad del trabajo*, Madrid, CAES, 1999. Sobre su influencia y magisterio consúltese, PRIETO, Carlos, “Homenaje a Andrés Bilbao”, *Cuaderno de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XX, nº 2, (2002), pp. 259-263.

¹¹⁵ DÍAZ-SALAZAR, Rafael, *¿Todavía la clase...*, *op.cit.*; id. (ed.), *Trabajadores precarios...*, *op.cit.*.

¹¹⁶ LÓPEZ CALLE, Pablo, *La desmovilización general...*, *op.cit.*. A la anterior obra ha de añadirse otros trabajos del mismo autor de enorme relieve teórico: id., “Fin y progreso del trabajo” en *¿Qué es el empleo?* Dossier monográfico, *Política y Sociedad*, nº 34, (2000), pp. 131-154.

¹¹⁷ MARUANI, Margaret, “De la Sociología del Trabajo a la Sociología del empleo” en *¿Qué es el...*, *op.cit.*, pp. 9-17; y id., *Trabajo y el empleo de las mujeres*, Madrid, Fundamentos, 2002.

¹¹⁸ ESCOBAR, Modesto R., *La identidad social del parado*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.

¹¹⁹ Además de todas las obras citadas y que se citarán, PRIETO, Carlos (dir. / coord.), *Los trabajadores y sus condiciones de trabajo*, Madrid, HOAC, 1994; id., “La degradación del empleo o la norma social del empleo flexibilizado”, *Sistema*, nº 168-169, (2002), pp. 89-106; id. (ed.), *Trabajo, género y tiempo social*, Madrid / Barcelona, Editorial Complutense / Editorial Hacer, 2007; y más recientemente, id. (coord.), *La calidad del empleo en España: una aproximación teórica y empírica*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009.

¹²⁰ Aparte de los títulos ya citados, SANCHIS, Enric, “La banalización del paro contemporáneo”, *Sistema*, nº 170, (2002), pp. 15-44; id., *Trabajo y paro en la sociedad posindustrial*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008.

acerca de la metamorfosis de la cuestión social¹²¹. Al respecto de la “conversión” del *trabajo* en *empleo*, los citados autores destacarían la gravedad del citado cambio en el rediseño de las categorías centrales de análisis social. En nuestro caso, será durante los gobiernos socialistas a raíz de las reformas laborales, y de la posterior aparición y consolidación de la temporalidad y de la precariedad laboral, cuando este mismo proceso se puede visualizar tanto a nivel teórico como empírico¹²².

En lo referente a los trabajos de campo acerca de los efectos múltiples en el uso de mano de obra dentro del modelo de producción flexible, sin ningún género de dudas, la escuela de Juan José del Castillo nucleada en torno al “Grupo de Investigación UCM en Ciencias Sociales del Trabajo Charles Babage” y la revista *Sociología del Trabajo*, ha sido la más prolífica. *Los obreros del polo* constituye la obra de referencia principal¹²³. La citada obra, y otras similares, no sólo permite adentrarse en los mecanismos de la producción flexible, sino también los fenómenos de desvalorización del trabajo asalariado.

A los citados han de sumarse, además, los trabajos del propio Xavier Coller¹²⁴ o Miguel Ángel García Calavia¹²⁵. La tesis doctoral de este último sociólogo de la Universidad de Valencia, cuya publicación llevaría por título, *La reestructuración del trabajo desde los años ochenta: continuidad y cambio*, describe detenidamente esta misma transformación de las condiciones laborales de la clase trabajadora, observándose todos los fenómenos sociales a la par que económicos puntualizados. Por último, los trabajos monográficos y colectivos de Daniel Lacalle –procedente de una escuela marxista de vieja alcurnia poco propensa a renovaciones– han proporcionado materiales a considerar, especialmente en relación a la fragmentación interna de la clase trabajadora¹²⁶.

¹²¹ CASTEL, Robert, *Las metamorfosis de...*, *op.cit.*.

¹²² Consúltense aquí las agudas reflexiones de, BROWN, Richard K., “¿Sucesión o acumulación? Sobre los cambios en los enfoques teóricos y en las preocupaciones sustantivas de la sociología del trabajo y del empleo”, *Sociología del Trabajo*, nº 69, (2010), pp. 5-19.

¹²³ CASTILLO, Juan José y LÓPEZ CALLE, Pablo, *Los obreros del Polo: una cadena de montaje en el territorio*, Madrid, Editorial Complutense, 2003. Y asimismo, CASTILLO, Juan José, *El trabajo fluido en la sociedad de la información: organización y división del trabajo en las fábricas de software*, Madrid, Miño y Dávila, 2007; id., *Los estragos de la subcontratación: la organización del trabajo como factor de riesgo laboral*, Madrid, Secretaria de Comunicación e Imagen de UGT-Madrid, 2004. Un último y revelador estudio de caso, puede verse en: id. y AGULLÓ, Itziar, *Trabajo y vida en la sociedad de la información. Un distrito tecnológico en el Norte de Madrid*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2012. Entre los múltiples trabajos publicados estos últimos años en *Sociología del Trabajo* nos remitimos al de: CALDERÓN, José Ángel: “Repensar la cuestión de la resistencia en el trabajo, o buscando al trabajador perdido: un estudio de caso en el sector del telemarketing”, *Sociología del Trabajo*, 56 (2006), pp. 33-73. Y: www.ucm.es/info/charlesb.

¹²⁴ COLLER, Xavier, *La empresa flexible...*, *op.cit.*; y también, id., “Sindicatos y transformación social” en *Las relaciones laborales en una economía globalizada*. Dossier monográfico, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 27-28, (1995), pp. 154-168.

¹²⁵ GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, *La reestructuración del trabajo desde los años ochenta: continuidad y cambio*, Valencia, Germania, 2003 [publicación de su tesis doctoral, dirigida por Andrés Bilbao [véase *Presentación, nota 130*]]; y unos años antes, id., “El mito de los nuevos paradigmas productivos”, *Sociológica: Revista de Pensamiento Social*, nº 3, (1998), pp. 121-146.

¹²⁶ En primer lugar, véanse dos de sus monografías más significativas: LACALLE, Daniel, *La clase obrera...*, *op.cit.*; id., *Trabajadores precarios. Trabajadores...*, *op.cit.*. Asimismo ha de reseñarse la colección de libros colectivos por él coordinados sobre la democracia económica: FERNÁNDEZ STEINKO, Armando y id. (eds.), *Sobre la democracia económica. La democracia económica en la sociedad*, III vols., Madrid, El Viejo Topo / Fundación de Investigaciones Marxistas, 2001, vol. I.; id. (eds.), *Sobre la democracia económica. La democracia en la empresa*, vol. II, 2001; id. (ed.), *Sobre la democracia económica. Los modelos organizativos y el papel del trabajo*, 2002, vol. III. En similar línea: LAHERA SÁNCHEZ, Arturo, *Enriquecer el factor humano: paradigmas organizativos y trabajo en grupo*, Madrid, El Viejo Topo / Fundación de Investigaciones Marxistas, 2005.

A medio camino entre el Derecho del Trabajo y otras especialidades, se han situado todo un conjunto de trabajos acerca de las políticas de empleo y el desarrollo de las relaciones laborales en España. Estudios que han basculado entre el análisis del mercado de trabajo a nivel institucional y la propia evolución sociolaboral, con referencias también a los procesos de concertación social y las propias reformas laborales. Aunque más adelante se volverá con detenimiento sobre el asunto, en el presente estado de la cuestión, al menos, se hace necesario citar las referencias básicas. En primer lugar, en este campo los trabajos de Álvaro Espina constituyen una referencia central. Espina quién ocuparía durante el mandato de Joaquín Almunia importantes puestos institucionales en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es además de buen conocedor de aquella época –gracias, en parte, a su privilegiada posición política a la hora de obtener información de primera mano– uno de los principales impulsores de la introducción de la flexibilización en España. El *sesgo*, por tanto, de sus estudios es considerable en obras *Empleo, democracia y relaciones industriales*, siempre a medio camino entre lo académico, lo político e incluso lo biográfico¹²⁷. A ello deben de sumarse, en primer término, la conocida y reeditada obra coordinada por Faustino Miguélez y Carlos Prieto –*Las relaciones laborales en España*¹²⁸– que aportan, a través de sus diferentes capítulos, una radiografía global sobre las principales cuestiones candentes de nuestro modelo de relaciones laborales. En términos jurídicos, y entre otras muchas, se hace necesario tener presente, la reciente y muy valiosa obra de José Luis Monereo, *La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral*¹²⁹. Ya en términos más generales, no pocos títulos de los estudios publicados por el Consejo Económico y Social como por ejemplo los de Antonio Martín Artiles –*Flexibilidad y relaciones laborales*¹³⁰– o el Ángel Blasco Pellicer –*La individualización de las relaciones laborales*¹³¹– desde la sociología y el derecho del trabajo respectivamente, contribuyeron a aclarar el panorama analítico. Por último, para un contexto internacional han sido de enorme utilidad los libros colectivos de Guido Baglioni y Colin Crouch y otros¹³². Ahora bien, un punto de inflexión lo constituiría la obra colectiva dirigida por Robert Boyer, *La flexibilidad del trabajo en Europa*¹³³. Dicho esto, todos los anteriores trabajos serían publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien llevaría a cabo durante aquellos años una magnífica tarea editorial.

¹²⁷ Se ha de reseñar, en primer lugar, su completo trabajo en, ESPINA, Álvaro, *Empleo, democracia y relaciones industriales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991; id., “Diez años en la vida de España. Las políticas laborales y de empleo” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., pp. 437-485; id., “Política de rentas en España” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999 [1991], pp. 331-357; id., *Modernización y estado de...*, op.cit..

¹²⁸ MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales...*, op.cit. [seguimos aquí la primera edición de 1991 en la mayor parte de los casos]. Con trabajos como los firmados por Juan José Castillo – “Reestructuración productiva y organización del trabajo” (pp. 23-42)– Antonio Baylos – “La intervención normativa del Estado en materia de relaciones colectivas” (pp. 289-301)– o Juan Ignacio Palacio Morena – “La política de empleo” (pp. 307-320)–.

¹²⁹ MONEREO PÉREZ, José Luis, *La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral*, Albacete, Bomarzo, 2011.

¹³⁰ MARTÍN ARTELES, Antonio, *Flexibilidad y relaciones laborales. Estrategias empresariales y acción sindical*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1995.

¹³¹ BLASCO PELLICER, ÁNGEL, *La individualización de las relaciones laborales*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1995. Consúltase aquí la perspectiva sociológica complementaria de, CALDERÓN, José Ángel y LÓPEZ CALLE, Pablo, “Transformaciones del trabajo e individualización de las relaciones laborales”, *Sociología del Trabajo*, nº 68, (2010), pp. 3-26.

¹³² BAGLIONI, Guido y CROUCH, Colin (comps.), *Las relaciones laborales en Europa: el desafío de la flexibilidad*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992; y la ya obra colectiva en varios volúmenes de, GUITTON, Christophe, REYNAUD, Emmanuèle y MARUANI, Margaret (coords.), *Debates sobre el...*, op.cit.;

¹³³ BOYER, Robert (dir.), *La flexibilidad del...*, op.cit..

En esta línea y dando un paso más, otro de los campos más prolíficos en estas dos últimas décadas ha sido el impacto de la dualización laboral del mercado de trabajo, a través de la temporalización y flexibilización del mercado de trabajo. Economistas, politólogos y sociológicos han atendido a las múltiples dimensiones de una realidad ya consolidada a nivel práctico e histórico: la teoría *insiders* y *outsiders*, es decir, la segmentación laboral entre *fijos* y *temporales*, ha contando con innumerables investigaciones en esta última década y media. Una teoría que en nuestro caso arrancaría sobre la base de los propios planteamientos de trabajos como el *informe Petras*, acerca de la brecha generacional en el interior de la clase obrera. Una tesis raramente discutida y que hoy forma parte de un extendido consenso¹³⁴ así como de un inacabado debate internacional –en paralelo al de los *institucionalistas* y los *regulacionistas*– y en donde también han de reseñarse más de una interpretación al respecto¹³⁵.

Los trabajos pioneros para el caso español de Javier García Polavieja siguen constituyendo la principal referencia. Su tesis doctoral publicada bajo el título, *Estables y precarios* es a día de hoy una lectura obligatoria, a partir de la cual examinar el impacto dualizador de las reforma laboral de 1984¹³⁶. A la citada se ha de agregar, tanto a nivel teórico

¹³⁴ Una de estas aisladas críticas en: BEA GONZÁLEZ, Eva M^a, GÓMEZ, M^a Carmen, INTXAUSTI, M^a José y FERREIRO APARICIO, Jesús, “Teoría *Insider-Outsider* y temporalidad en el mercado de trabajo español”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, n^o 51, (2004), pp. 31-54.

¹³⁵ A nivel teórico sobre la segmentación, véase, en primer lugar una de las principales obras al respecto: EDWARDS, Richard, REICH, Michael y GORDON, David, *Labour Market Segmentation*, Lexington (Mass), D. C. Heath, 1971. De los mismos autores: “Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation”, *American Economy Review*, vol. LXIII, n^o 2, (1973), pp. 359-365. Por último, también, GORDON, David M., EDWARDS, Richard y REICH, Michael, *Trabajo segmentado, trabajadores divididos: la transformación histórica del trabajo en Estados Unidos*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986. Y desde la visión de la escuela liberal institucionalista: DOERINGER, Peter B. y PIORE, Michael, *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*, Lexington (Mass), D. C. Heath, 1971. También desde este mismo ángulo: SOLOW, Robert, “Insiders and Outsiders in Wage Determination”, *Scandinavian Journal of Economics*, vol. LXXXVII, n^o 2, (1985), pp. 411-428. Una visión de síntesis, LINDBERCK, Assar y SNOWER, Dennis J., *The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment*, Cambridge / Massachusetts, MIT Press, 1988; FINE, Ben, *Labour Market Theory. A Constructive Reassessment*, London / New York, Routledge, 1998. E igualmente: GÜELL-ROTLLAN, Maia, “Fixed-Term Contracts and Unemployment: An Efficiency Wage Analysis”, *Discussion Papers. Centre for Economic Performance. London School of Economic*, n^o 0461, (2000); y, ESPING-ANDERSEN, Gøsta y REGINI, Marino, *Why Deregulate Labour Markets?* Oxford, Oxford University Press, 2000. Un balance, a modo de estado de la cuestión, en: CARRASCO, Inmaculada, CASTAÑO, M^a Soledad y PARDO, Isabel, “Diferentes desarrollos del mercado de trabajo” en GALINDO MARTÍN, Miguel Ángel y RIBEIRO SORIANO, Domingo (eds.), *Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica*. Dossier monográfico, *Información Comercial Española*, n^o 858, (2011), pp. 89-102.

¹³⁶ GARCÍA DE POLAVIEJA, Javier, *Estables y precarios...*, *op.cit.*; id., “The dualisation of unemployment risks class and insider / outsider patterns in the Spanish Labour Market”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, n^o 128, (1998); y, id., “How do labour market experiences affect political attitudes? Analysing the political effects of labour market dualisation in Spain?”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, n^o 142, (1999); id., “Temporary contracts and labour market segmentation in Spain: An Employment-Rent Approach”, *European Sociological Review*, vol. XIX, n^o 5, (2003), pp. 501-517; y, id., “¿Por qué es tan alta la tasa de empleo temporal? España en perspectiva comparada”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n^o 113, (2006), pp. 77-108. En similar línea: ALBA RAMÍREZ, Alfonso, “Labor market effects of fixed-term employment contracts in Spain”, *Working Papers. Universidad Carlos III*, n^o 96-60, (1996); AMUEDO-DORANTES, Catalina, “Work transitions into and out of temporary employments in a Segmented Market: Evidence from Spain”, *Industrial and Labour Relations Review*, vol. LIII, n^o 2, (2000) pp. 309-325. Y, por último, CASQUEL, Elena, *The causes and consequences of temporary jobs in Spain: a theoretical-empirical approach*, Valencia, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 2004.

como práctico, las obras tanto sobre los procesos de segmentación/dualización como de precarización laboral de Albert Recio¹³⁷, Antonio Santos Ortega¹³⁸, Ernest Cano¹³⁹ desde una perspectiva crítica; y desde otro enfoque más en consonancia con las tesis liberales, los de Carlos Álvarez Aledo¹⁴⁰, Lluís Fina¹⁴¹, Ana Huguet Roig¹⁴², Virginia Hernanz Martín¹⁴³ y cómo no los de Luis Garrido¹⁴⁴. Trabajos a los que han de sumarse los relacionados con la precariedad laboral juvenil, tal y como se abordará en el siguiente subapartado.

Como señalábamos nos encontramos ante un *corpus bibliográfico* difícil de abarcar. A pesar de que en los diferentes capítulos de esta investigación se abordará con más detalle todas estas cuestiones, aquí también, al menos, debe hacerse constar los numerosos trabajos sobre los efectos psicológicos del paro/desempleo o en torno a la propia la economía sumergida, junto con los citados ya sobre la misma precariedad laboral¹⁴⁵. Estudios como los de Josep Blanch Ribas –*Desempleo juvenil y salud psicosocial*¹⁴⁶– o los de José Luis Estramiana –*Desempleo y bienestar psicológico*¹⁴⁷– han indagado en la cara no visible del mercado laboral. Una perspectiva que, en términos generales, suele ser omitida en las grandes narraciones¹⁴⁸.

¹³⁷ Junto con las obras ya anteriormente citadas: RECIO, Alberto, “La segmentación del mercado de trabajo en España” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales...*, op.cit., pp. 97-115; id., “Paro, precarización laboral e ideología económicas”, *Sistema*, nº 168-169, (2002), pp. 52-69; id., “Notas sobre el modelo de empleo español”, *Gaceta Sindical*, nº 5, (2005), pp. 77-100. A destacar también, id., OFFE, Claus y GORZ, André, *El paro y el empleo: enfoques alternativos*, Valencia Germania, 1997.

¹³⁸ A resaltar, en primer lugar, su tesis doctoral, SANTOS ORTEGA, Antonio, *Trayectorias sociales del paro de larga duración*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2004. Años antes había publicado el imprescindible ‘manual’: id., MONTALBÁ OCAÑA, Carmen y MOLDES FARELO, Roció, *Paro, exclusión y políticas de empleo: aspectos sociológicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004. De notable interés, id., “La invasión de la ideología empresarial en los márgenes del mercado de trabajo: inseguridad laboral, paro e inserción”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, vol. XXI, nº 1, (2003), pp. 107-128.

¹³⁹ Véase en primer lugar uno de los trabajos de referencia básicos de esta investigación en: CANO, Ernest, BILBAO, Andrés y STANDIGN, Guy, *Precariedad laboral, flexibilidad y desregulación*, Valencia, Germania, 2000; id., “Formas, percepciones y consecuencias de la precariedad”, *Mientras Tanto*, nº 93, (2004), pp. 67-81.

¹⁴⁰ ÁLVAREZ ALEDO, Carlos, *El impacto de la contratación temporal sobre el sistema productivo español. Relaciones de segmentación laboral y productiva*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1995.

¹⁴¹ A los ya citados trabajos han de sumarse, entre otros, el siguiente: FINA, Lluís, *Mercado de Trabajo y políticas de empleo*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2001.

¹⁴² HUGUET ROIG, Ana, *Segmentación en el mercado de trabajo español*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1999.

¹⁴³ HERNANZ MARTÍN, Virginia, *El trabajo temporal y la segmentación. Un estudio de las transiciones laborales*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003.

¹⁴⁴ Véase sus trabajos ya apuntados en *Presentación*, nota 81; y id., “Paro juvenil o desigualdad”, *Revista de Investigaciones Sociológicas*, nº 75, (1996), pp. 236-267.

¹⁴⁵ Véase la *Presentación*, nota 100 y nota 101.

¹⁴⁶ BLANCH RIBAS, Josep, *Desempleo juvenil y salud psicosocial*, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1986. Véase aquí también, GARRIDO LUQUE, Alicia, “Psicología social del desempleo” en ESTRAMIANA, José Luis, GARRIDO LUQUE, Alicia y TORREGROSA, José Ramón (coords.), *Psicología social aplicada*, Madrid, McGraw-Hill, Interamericana, 1996, pp. 121-154.

¹⁴⁷ ÁLVARO ESTRAMIANA, José Luis, *Desempleo y bienestar psicológico*, Madrid, Siglo XXI, 1992.

¹⁴⁸ Aunque en el apartado relativo a las transiciones y biografías laborales juveniles se abordará con mayor precisión los problemas psicológicos y relacionados de la situación del empleo/desempleo,

2.2.5. Sociología de la juventud: rebatiendo las tesis consensualistas e institucionales

En *Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de la clase obrera*, Paul Willis se internaba desde una perspectiva socio-cultural innovadora en aquel momento, por lo que definía como la *cultura contra-escolar de la clase obrera*¹⁴⁹. A partir de un estudio de caso basado en los procesos de formación y transición de un grupo de escolares y jóvenes de una ciudad británica, examinaba a su vez los modelos de reproducción social, cultural pero ante todo de clase. Estudio hoy de referencia tanto en el mundo anglosajón como en castellano –a pesar de su muy mala traducción hasta tiempos recientes– no ha dejado desde entonces de ser citado –e inclusive alabado– por la sociología cultural y postmoderna¹⁵⁰.

El estudio de Willis se internaba, precisamente, en el mismo seno de la clase obrera a través de sus extractos juveniles. Una cuestión, en la práctica, a día de hoy impensable no tanto por el enfoque como por el objeto de investigación. Aunque no redundáremos aquí en lo que buena parte de la sociología de la juventud crítica ha venido a remarcar al respecto, al menos, han de plantearse una serie de consideraciones básicas. Consideraciones que guardan no sólo una estrecha relación con la formación de la “generación de la precariedad laboral”, sino con los marcos explicativos para aproximarse al “sujeto histórico” de la juventud española contemporánea.

En este trabajo, se toma por válida la definición que Enrique Martín Criado ha ofrecido en varias ocasiones sobre la *juventud*, las *juventudes*. El autor de *Producir la juventud* vincula a las juventudes como un “objeto preconstruido” que suele aislarse de “la estructuración de la sociedad en clases sociales”, y que, además, tiende a ser considerado, en exclusiva, como un mero “grupo social”, que leído, además, en términos problemáticos poco o nada tendría que ver

cuanto menos han de mencionarse las siguientes obras: en primer lugar; RUIO ARRIBAS, Francisco Javier, “Aspectos sociológicos del desempleo/paro y de la precariedad laboral”, *Nómadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, nº 24, (2009), pp. 55-64; o la pionera tesis de, SERRANO PASCUAL, Amparo, *Inserción laboral como transición psicosocial*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1995. Al respecto de la economía sumergida referencias de primer orden en: RUESGA BENITO, Santos M. (comp.), *Economía oculta y mercado de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987; AMANDO, Miguel de, *España oculta: la economía sumergida*, Madrid, Espasa-Calpe, 1988; SANCHIS, Enric y MIÑANA, José (eds.), *La otra economía: trabajo negro y sector informal*, València, Edicions Alfons el Magnàmin, 1988; HURTADO, Jorge, *Implicaciones sociales de la economía sumergida: una investigación sociológica*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1996. A sumar, claro está, al informe pionero de, MURO, Juan de Dios, RAYMOND, José Luis L., TOHARIA, Luis y URIEL, Ezequiel, *Análisis de las condiciones...*, *op.cit.*. Por lo demás, consúltese, de nuevo, lo ya apuntado en la *Presentación*, *nota 53*, *nota 100* y *nota 101*.

¹⁴⁹ WILLIS, Paul, *Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajados de clase obrera*, Madrid, Akal, 1988 [reeditado unos años más tarde en 2004 y en 2008, de nuevo por Akal].

¹⁵⁰ Véase al respecto el examen de dicha obra en, FEIXA, Carles, *De jóvenes, bandas y tribus: antropología de la juventud*, Barcelona, Ariel, 1998.

con los propios procesos de reproducción social¹⁵¹. Una posible definición a sumarse a otras tantas que se han venido planteando en estas dos últimas décadas¹⁵².

En este campo, los estudios historiográficos son prácticamente inexistentes una vez más. En cualquier caso, ha de destacarse el importante esfuerzo teórico y metodológico de la historiadora Sandra Souto Kustrín al respecto –*Juventud, teoría e historia: la formación del sujeto social y de un objeto de análisis*¹⁵³–. Así la mayoría de las aportaciones sobre la juventud, sus definiciones y métodos de análisis han procedido del mundo anglosajón, con trabajos de peso como los de Johanna Win y Robert White –*Rethinking Youth*¹⁵⁴– o los de Claire Wallace y Sijka Kovatcheva –*Youth in Society*¹⁵⁵– o concretamente los de John Randall –*Youth and History*¹⁵⁶–entre otras referencias básicas y clásicas¹⁵⁷. No obstante, no debe minusvalorarse las recientes contribuciones de no pocos sociólogos españoles en las que nos detendremos en breve.

A poco que se invite a pensar y a reflexionar sobre esta misma cuestión, es en este preciso terreno en donde mejor se puede visualizar la progresiva pérdida de la centralidad de la relaciones capital-trabajo, a la hora de examinar una realidad social e histórica concreta. A saber: en este mismo terreno los paradigmas del *giro cultural* y *lingüístico* resultan no ya preeminentes sino hegemónicos. Una realidad que ha tenido sus correspondientes efectos a nivel académico como político. Pareciera, pues, cuando se examina lo publicado en esta última década, que no existirían jóvenes trabajadores. ¿Jóvenes obreros y/o trabajadores hoy desde la sociología de la juventud “institucional” por no hablar “oficial”? Impensable, simplemente. No sólo es que hayan desaparecido las clases sociales de cualquier pretensión investigadora, sino

¹⁵¹ «La ‘juventud’ es una prenoción, un objeto preconstruido. Producido como categoría de sentido común de percepción de la sociedad a partir de unas dinámicas socio-históricas, sólo el ‘olvido’ de la estructuración de la sociedad en clases sociales puede permitir constituir un abanico de edades como ‘grupo social’, como actante de un relato sobre la sociedad que ignoraría las diferentes condiciones materiales y sociales de existencia asociadas a las diferentes posiciones en la estructura social: en las relaciones de producción y en la distribución de las diferentes especies de capital». MARTÍN CRÍADO, Enrique, “Juventud” en REYES, Román (ed.) y MUÑOZ, Juan (coord.), *Diccionario crítico de Ciencias Sociales*, IV vols., Madrid, Plaza y Valdés, 2009, vol. IV, pp. 1630-1635. Véase también aquí, FEITO ALONSO, Rafael, *Estructura social contemporánea: las clases sociales en los países industrializados*, 2ª ed., Madrid, Siglo XXI, 1997 [1995].

¹⁵² Además del conjunto de definiciones proporcionadas en su día por, AGULLÓ TOMÁS, Esteban, *Jóvenes, trabajo e...*, *op.cit.*; y por, REVILLA, Juan Carlos, “La construcción discursiva...”, *op.cit.* [del mismo autor, existe un consistente estudio no publicado pero que sirvió de material de trabajo en el *Curso de Postgrado Juventud y Sociedad* –UNED, 2005/2006– “Concepciones y modelos de juventud” en CURSO DE POSTGRADO JUVENTUD Y SOCIEDAD, *Módulo I. Análisis sociológico de la juventud. Texto de la Unidad 1*, Madrid, UNED / Instituto de la Juventud, 2005] consúltese también, BERGUA AMORES, José Ángel, “De-finición y des-finitación de la juventud: una crítica de la teoría estándar”, *Política y Sociedad*, nº 32, (1999), pp. 231-242.

¹⁵³ SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Juventud, teoría e historia: la formación del sujeto social y de un objeto de análisis”, *Historia Actual Online*, nº 13, (2007), pp. 171-192; de la misma autora, id. (coord.), *Ser joven en la Europa de entreguerras: política, cultura y movilización*. Dossier monográfico, *Hispania*, vol. LVII, nº 225, (2007). Y, por otro lado, ALBA, Víctor, *Historia Social de la Juventud*, Barcelona, Plaza & Janés, 1979.

¹⁵⁴ WIN, Johanna y WHITE, Robert, *Rethinking Youth*, London, Sage Publications, 1997.

¹⁵⁵ WALLACE, Claire y KOVATCHEVA, Sijka, *Youth in Society. The Construction and Deconstruction of Youth in East and Western Europe*, Basingstoke, MacMillan, 1998.

¹⁵⁶ GILLIS, John Randall, *Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations, 1770-Presente*, New York / San Francisco / London, Academic Press, 1974.

¹⁵⁷ Por citar tan sólo dos posibles ejemplos: ALLERBBECK, Klaus y ROSEN MAYR, Leopold, *Introducción a la sociología a la juventud*, Madrid, Buenos Aires, Kapelusz, 1979; y, GALLAND, Olivier, *Sociologie de la jeunesse. L'entrée dans la vie*, Paris, Armand Colin, 1991.

que además la centralidad del mundo de trabajo aparece –si es que aparece– como un escenario poco relevante.

Ha sido Pablo López Lacalle quien mejor ha sabido observar este fenómeno de connotaciones no sólo académicas, sino también político-ideológicas:

«A todo ello ha contribuido, obviamente, la sustitución de las viejas categorías de análisis sociológico que clasificaban a la población en función de su posición absoluta respecto de la propiedad de los medios de producción –clase obrera y burguesía–, por nuevas formas de clasificación de carácter relativo en función de la renta personal, que asignan un estatuto social particular en relación a la suma del conjunto, permitiendo situar, lógicamente, a la mayor parte de la población, subjetiva y objetivamente, en torno a las clases medias»¹⁵⁸.

¿Cómo se ha traducido todo lo anterior en términos investigadores? Ya apuntamos en la *Presentación* que el campo de las políticas públicas de juventud este fenómeno se expresaba como la transición de las *políticas integrales* a las *políticas afirmativas*¹⁵⁹. Ahora bien, en el terreno eminentemente práctico, la temática de los recientes estudios de juventud –especialmente a nivel institucional o financiados por las administraciones públicas– ha conllevado que apenas sean objeto de interés asuntos de la trascendencia como la precariedad laboral, las transiciones laborales, la exclusión social o inclusive la participación política en los canales tradicionales –partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos...–. En la práctica, se han convertido en temas accesorios que indican cierta situación de *malestar social*, pero que no serían, de nuevo, determinantes en la configuración de la condición juvenil moderna.

Un simple repaso –no exhaustivo– por los números monográficos de *Revista de Estudios de Juventud* del propio Instituto de Juventud (INJUVE) –revista de referencia dentro de la sociología de la juventud– durante algo más del último lustro –entre 2005 a 2011– nos vienen a reconfirmar esta *nueva realidad*. Así pues, en los veintisiete números monográficos publicados en estos mismos años –en concreto del número 68 al número 95– ninguno ha tocado los anteriores temas de forma directa. Por ejemplo en el número 77 (2007) dedicado a la “Movilización social y creatividad política de la juventud” sólo el artículo de Lorenzo Mosca venía a acercarse a las nuevas formas de organización juvenil contra la precariedad laboral –“MayDAY parade. Movilizaciones juveniles contra la precariedad laboral”¹⁶⁰. Y, sin embargo, no se dedicaba ningún espacio a las organizaciones tradicionales del movimiento obrero/sindical, quienes llevaban desde hacía años realizando campañas al respecto. Ciertamente, cuando se lee el número 76 (2006) –dedicados a los nuevos movimientos sociales juveniles– los textos de Miguel Martínez López –“El Movimiento de Okupaciones: contracultura urbana y dinámicas alter-globalización”¹⁶¹– o de Pablo Iglesias Turrión –“Algunos centenares de jóvenes de la izquierda radical: desobediencia italiana en Madrid (2000-

¹⁵⁸ LÓPEZ CALLE, Pablo, *La desmovilización general...*, op.cit., p. 85.

¹⁵⁹ Junto con lo apuntado en la *Presentación*, nota 28, PANIAGUA, Juan Luis (dir.), *Informe sobre políticas de la juventud en España 99*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1999; NAVARRETE, Lorenzo (dir.), *Jóvenes, derechos y ciudadanía*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2006; y desde una perspectiva jurídica, MORGADA PANADERO, Purificación (coord.), *Jóvenes y políticas públicas*, Madrid, La Ley, 2008. Por lo demás: COMAS, Domingo, *Las políticas de juventud en la España democrática*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2007. A nivel internacional véase el *informe*, VERSCHOLDEN, Griet, COUSSÉE, Filip, WALLE, Van de y WILLIAMSON, Howard (eds.), *The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy today*, Paris, Council of Europe, 2009. También resulta de interés, “Políticas de Juventud en Europa, un contexto de flexibilidad e incertidumbre”. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 65, (2004).

¹⁶⁰ MOSCA, Lorenzo, “MayDay parade. Movilizaciones juveniles contra la precariedad laboral” en *Movilización social y creatividad política de la juventud*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 75, (2006), pp. 75-97.

¹⁶¹ MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel, “El Movimiento de Okupaciones: contracultura urbana y dinámicas alter-globalización”, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 77, (2007), pp. 201-223.

2005)”¹⁶²– analizan algunas de las nuevas dinámicas de acción y asociacionismo juvenil desde una perspectiva anticapitalista. Lejos, en cualquier caso, de “viejos eufemismos” como la *lucha de clases*. Incluso en el número 79 (2007) dedicado a *Trabajo, salud y precariedad* si bien se abordarían los efectos paralelos de la degradación de las nuevas condiciones laborales en los jóvenes, en cambio no se detendría en los procesos de inserción laboral ni menos en los propios condicionantes de la precariedad juvenil estructural, más allá de lo aportado por Amaro Osca Segovia y Blanca López en torno a los “Factores explicativos de la accidentalidad en jóvenes”¹⁶³, o en el caso del texto de Virginia Linares Rodríguez, “Riesgos laborales y jóvenes”¹⁶⁴.

Nota llamativa de lo hasta ahora aquí comentado sería la aportación de Víctor Manuel Muñoz Sánchez en el dossier monográfico *Reflexiones sobre la juventud del siglo XXI* –número 87 (2009)– que bajo el título, “Apuntes teóricos sobre la crisis del empleo juvenil”, hacía un breve viaje al pasado para llegar a proponer en línea con las tesis consensualistas la necesidad de un gran pacto social para el reparto solidario del empleo¹⁶⁵. Tampoco allí se abordaban los condicionantes del desempleo y la precariedad juvenil así como sus indicadores principales. Un último ejemplo, lo constituiría el número 89 dedicado a *Discriminaciones diversas en las personas jóvenes*. En el mismo se incluirían dos interesantes contribuciones que indagarían tanto por las discriminaciones laborales juveniles –José Pablo Aramendi Sánchez “La discriminación de los y las jóvenes en el trabajo”¹⁶⁶– como por las propias trayectorias laborales –Elsa Santamaría López, “«Buscarse la vida»: trayectorias y experiencia de precariedad en al acceso al empleo de las personas jóvenes”¹⁶⁷–. En cualquier caso, y una vez más, no se adentraban en cualquier análisis o balance de la configuración del modelo socio-laboral y su relación conflictiva con la juventud.

Excepciones aparte, volvemos a nuestro punto de partida: ¿dónde quedaron los jóvenes trabajadores? O ¿su relación con el movimiento sindical? O directamente, ¿sus condiciones laborales precarias? Simplemente, no aparecen más allá de su construcción cronológica, estadística –activos, no activos, parados, no parados...– y muy lejos de las tradicionales categorías políticas, sociológicas y económicas. Uno de los casos más significativos lo tenemos en un dossier monográfico del *Observatorio Joven de Empleo en España* (OBJOVEM) –vinculado con el Consejo de la Juventud de España– que en su número extra 6 llegaría a omitir en su título la palabra trabajadores o jóvenes trabajadores por “personas jóvenes” a la hora de hablar del grave problema de la economía oculta/sumergida y la juventud¹⁶⁸. ¿Error? ¿Casualidad? O ¿simplemente, un hecho asimilable a los *nuevos tiempos*? No parece que sea así

¹⁶² IGLESIAS TURRIÓN, Pablo, “Algunos centenares de jóvenes de la izquierda radical: desobediencia italiana en Madrid (2000-2005)”, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 77, (2007), pp. 245-265.

¹⁶³ OSCA SEGOVIA, Amparo y LÓPEZ, Blanca, “Factores explicativos de la accidentalidad en jóvenes: un análisis de la investigación”, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 79, (2007), pp. 75-90.

¹⁶⁴ LINARES RODRÍGUEZ, Virginia, “Riesgos laborales y jóvenes: análisis del tratamiento informativo en la prensa española”, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 79, (2007), pp. 159-175.

¹⁶⁵ MUÑOZ SÁNCHEZ, Víctor Manuel, “Apuntes teóricos sobre la crisis del empleo juvenil” en *Reflexiones sobre la juventud del siglo XXI*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 87, (2009), pp. 47-66.

¹⁶⁶ ARAMENDI SÁNCHEZ, José Pablo, “La discriminación de los y las jóvenes en el trabajo” en *Discriminaciones diversas en las personas jóvenes*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 89, (2010), pp. 79-99.

¹⁶⁷ SANTAMARÍA LÓPEZ, Elsa, “«Buscarse la vida»: trayectorias y experiencias de precariedad en el acceso al empleo de las personas jóvenes” en *Discriminaciones diversas en...*, *op.cit.*, pp. 101-123.

¹⁶⁸ OBJOVEM (Observatorio Joven de Empleo en España), titulado: *Personas jóvenes y economía sumergida en la España contemporánea*, nº 6 (extra) (2009) [www.cje.org].

cuando también –y tal como acabamos de ver– el propio número 89 (2010) de la *Revista de Estudios de Juventud* empleaba el término “personas jóvenes” en su propio título.

Así pues, nos encontramos con una nueva *agenda investigadora* cargada de temáticas “innovadoras”, que se ha hecho fuerte dentro de la sociología de la juventud –y por extensión dentro del resto de ramas del conocimiento social–. Sin salirnos de la propia *Revista de Estudios de Juventud*, en primer lugar, destacan los estudios basados en el *giro cultural* y en el *giro lingüístico* –véanse, el número 68 (2005) “Jóvenes y medios de comunicación”, el número 70 (2005) “Jóvenes y lecturas” y concretamente el 78 (2007) en torno a “Tácticas de comunicación juvenil” con artículos de la relevancia como los de Carmen Galán Rodríguez (“Cncta kn nstrs (conecta con nosotros): los SMS universitarios”¹⁶⁹) o de Ana Sanz (Los concursos en la televisión: mama (sin tilde), ¡quiero ser famoso!”¹⁷⁰) –. Las relaciones grupales y entre iguales, no dejan de atraer nuevos investigadores a la “causa” –por ejemplo, el número 72 (2006), “Jóvenes y campamentos de verano”¹⁷¹–. En cualquier caso, han sido las cuestiones relacionadas con los temas culturales y los valores ciudadanos los que mayor atención han concitado –ahí están el número 80 (2008) “Juventud y la Alianza de Civilizaciones” o el número 81 (2008) “La juventud frente a la política”–. Estudios que han prestado una considerable atención al acceso de la condición ciudadana de los jóvenes en base a una posible participación política. Unos presupuestos analíticos que conllevan una *presunción* estrictamente político-ideológica antes que científica: pues se nos dibuja a la juventud como categoría social incompleta, en tanto estaría limitada en sí misma hasta su acceso a la condición de ciudadano, a través de unas conceptualizaciones y barreras siempre difíciles de categorizar en términos materiales. De la misma forma, esta perspectiva cultural tiende a interpretar casi de forma exclusiva el acceso a la ciudadanía desde un enfoque electoralista e institucionalista. Estaríamos, pues, ante un predominio del esquema funcionalista sociológico, interesado no tanto en los valores e identidades políticas, sino en el voto juvenil de este potencial electorado – consúltese, el número 85 (2009) dedicado a la ampliación de edad de “El voto juvenil”–.

Dentro de la amplia bibliografía sobre los jóvenes y/o la juventud, que ha abarcado todos los temas posibles e imaginables en no pocas ocasiones, se hace necesario –a grandes rasgos– hablar de dos “categorías” de sociología de la juventud. Aun a riesgo de simplificar en exceso, por un lado, habría que destacar los “estudios institucionales-académicos” y, por otro lado, los estudios “académicos” críticos o no. Desde mediados de los años ochenta, en cualquier caso, se ha asistido a una creciente profesionalización de la propia sociología de la juventud, en paralelo, a la consolidación de las políticas de juventud. Una profesionalización y una normalización que han conducido a la posibilidad de hablar de una disciplina especializada con sus líneas de investigación, revistas, debates e inclusive sus cada vez más numerosas tesis doctorales.

Un posible estado de la cuestión crítico en torno a los estudios “institucionales-académicos” se pueden encontrar en las obras ya varias veces citadas de Enrique Criado o del propio Colectivo IOE¹⁷². A los mismos deberían añadirse algunas aportaciones actualizadas

¹⁶⁹ GALÁN RODRÍGUEZ, Carmen, “Cncta kn nstrs (conecta con nosotros): los SMS universitarios”, *Revistas de Estudios de Juventud*, nº 8, (2007), pp. 63-74.

¹⁷⁰ SANZ, Ana, “Los concursos de televisión: mama (sin tilde), ¡quiero ser famoso!”, *Revistas de Estudios de Juventud*, nº 8, (2007), pp. 193-208.

¹⁷¹ Véase, por ejemplo, GARCÍA CRESPO, Miguel Ángel, “Jóvenes y multiaventura: un modelo de éxito” en *Jóvenes y campamentos de verano*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 72, (2006), pp. 129-137.

¹⁷² Véase, MARTÍN CRIADO, Enrique, *Producir la juventud...*, *op.cit.*, y concretamente: “2. La sociología de la juventud en España” (pp. 40-71); COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de], *Condiciones de trabajo...*, *op.cit.*. Y asimismo: GONZÁLEZ BLASCO, Pedro, “¿Qué dicen las investigaciones de los jóvenes?”, *Documentación Social*, nº 95, (1994), pp. 106-117; y, SAEZ MARÍN, Juan, “Los estudios sobre juventud en España: contextos de un proceso de investigación-acción (1960-1990)”, *Revista Internacional de Sociología*, nº 10, (1995), pp. 159-197.

como las tesis de Gradys Mathieu Breglia –*La investigación sobre la relación de los jóvenes con la política en los Estudios de Juventud de España*¹⁷³– o la de Juan Ignacio Aranda –*Políticas de juventud en España y la Unión Europea*¹⁷⁴–.

Aquí de nuevo no se puede desvincular lo político de lo académico. En paralelo a las transformaciones de las políticas de juventud, se produciría el cambio de intereses de los estudios académicos/institucionales. Una evolución perfectamente observable en los conocidos *Informes de Juventud*. Desde el fin de la dictadura hasta el presente decenas de los mismos han sido publicados, convirtiéndose en las principales referencias de la literatura académica-institucional. Estudios que han basculado, principalmente, en torno a los conocidos –como reconocidos– informes periódicos del Instituto de la Juventud –nos referimos a los del año 1985, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 y 2008¹⁷⁵– y los publicados por la Fundación Santa María –los publicados con respecto a los años 1984, 1989, 1994, 2005 y 2010¹⁷⁶– esta última siempre más preocupada por los valores e ideas religiosas de los jóvenes ciudadanos españoles.

La progresiva desaparición de la centralidad del mundo del trabajo y sus aspectos aledaños se observa sin prácticamente ningún tipo de problema tanto en unos como en otros, cuando se procede a escudriñar, por ejemplo, los contenidos y los enfoques del *Informe de*

¹⁷³ MATHIEU BREGLIA, Gladys, *La investigación sobre la relación de los jóvenes con la política en los Estudios de Juventud de España (1990-2004)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2007.

¹⁷⁴ GRANDE ARANDA, Juan Ignacio, *Políticas de juventud en España y la Unión Europea*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2010.

¹⁷⁵ ZARRAGA, José Luis (dir.), *Informe Juventud de España 1985. La inserción de los jóvenes en la sociedad*, VII vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 1985, vol. I; GIL-CALVO, Enrique y MENÉNDEZ VERGARA, Elena, *Ocio y prácticas culturales de los jóvenes*, vol. II; CONDE, Fernando, *Las relaciones personales y familiares de los jóvenes*, vol. III; COMAS ARNAU, Domingo, *El uso de las drogas en la juventud*, vol. IV; PRIETO LACACI, Rafael, *La participación social y política de los jóvenes*, vol. V; MONTERO ROMERO, Ricardo, *La inserción en la actividad económica: empleo y paro juvenil*, vol. VI; ALVIRA MARTÍN, Francisco y CANTERAS MURILLO, Andrés, *Delincuencia y marginación juvenil*, vol. VII; ZARRAGA, José Luis (dir.), *Informe de juventud en España 1989*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1988; NAVARRO LÓPEZ, Manuel y MATEO RIVAS, M^a José (dirs.), *Informe Juventud en España '92*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1993; MARTÍN SERRANO, Manuel y VELARDE HERMIDA, Olivia, *Informe de la Juventud 1996*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1997; id. y id., *Informe juventud en España 2000*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2001; AGUINAGA ROUSTAN, Josune, ANDRÉU ABELA, Jaime, CACHÓN, Lorenzo, COMAS ARNAU, Domingo, LÓPEZ BLASCO, Andreu y NAVARRETE MORENO, Lorenzo, *Informe de Juventud de España 2004*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2005; y, LÓPEZ BLASCO, Andreu, *Informe 2008: Juventud en España. Jóvenes en una sociedad cambiante: demografía y transiciones a la vida adulta*, V vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 2009; MORENO MÍNGUEZ, Almudena, *Economía, empleo y consumo: las transiciones juveniles en el contexto de la globalización*, vol. II; COMAS ARNAU, Domingo, *Estado de la salud de la juventud*, vol. III; FUNES, M^a Jesús, *Cultura, política y sociedad*, vol. IV; y, PARELLA, Sonia, *Desigualdades de género, jóvenes inmigrantes*, vol. V, respectivamente.

¹⁷⁶ BELTRÁN, Miguel, GARCÍA FERRANDO, Manuel, GONZÁLEZ-ANLEO, Juan, LÓPEZ PINTOR, Rafael y TOHARIA, José Juan, *Informe sociológico sobre la juventud española 1960/82*, Madrid, SM, 1984; ANDRÉS ORIZO, Francisco, GÓMEZ-REINO, Manuel, GONZÁLEZ BLASCO, Pedro, LINZ, Juan José y TOHARIA, José Juan, *Juventud española 1984*, Madrid, SM, 1985; GONZÁLEZ BLASCO, Pedro, ANDRÉS ORIZO, Francisco, TOHARIA CORTÉS, José Juan y ELZO, Javier, *Jóvenes españoles 89*, Madrid, Fundación Santa María, 1989; ELZO, Javier, ANDRÉS ORIZO, Francisco, GONZÁLEZ BLASCO, Pedro y IRENE DEL VALLE, Ana, *Jóvenes españoles 94*, Madrid, Fundación Santa María, 1994; ELZO, Javier, ANDRÉS ORIZO, Francisco, GONZÁLEZ-ANLEO, Juan, GONZÁLEZ BLASCO, Pedro, LAESPADA, M^a Teresa y SALAZAR, Leire, *Jóvenes Españoles 99*, Madrid, SM, 1999; GONZÁLEZ BLASCO, Pedro, ELZO, Pedro, ELZO, Javier, GONZÁLEZ-ANLEO, Juan M^a, LÓPEZ RUIZ, José Antonio y VALLS IPARRAGUIRE, Maite, *Jóvenes Españoles 2005*, Madrid, SM, 2006; GONZÁLEZ-ANLEO, Juan M^a y GONZÁLEZ BLASCO, Pedro (dirs. / coords.), *Jóvenes españoles 2010*, Madrid, SM, 2010, respectivamente.

Juventud de 1985 al *Informe de Juventud* de 2008 del INJUVE. Igualmente, la nómina de sociólogos –cuando se revisa volumen por volumen– releva, al mismo tiempo, la aparición de consumados especialistas en la citada cuestión. También aquí, por tanto, se podría hablar de curtidos “expertos”. Y pese a lo dicho y su tendencia a la monotonía descriptiva, estos mismos estudios son claves –por más que se puedan criticar su enfoque así como su metodología– si se pretende realizar una historia de la juventud contemporánea española. Tras tantos años y tras tantos informes, su calidad ha mejorado sobresalientemente.

Desde mediados de los años ochenta cada vez comenzarían a ser más frecuentes los estudios que iban a indagar sobre la juventud y el mercado de trabajo fuera de los canales institucionales. Una conflictiva relación, en donde paso a paso, se dibujaría la cruda realidad laboral juvenil que años más tarde describiría el propio Petras. Unas investigaciones que, en un primer momento, no tendrían una fácil “salida editorial”. Monografías, libros colectivos, artículos científicos que además de visualizar esta relación conflictiva, mostrarían a la juventud, a los jóvenes, como un problema social y económico de primer orden, aunque alejado de las propias *agendas* institucionales-políticas.

Lejos de ciertos de *tonos institucionales* aunque dentro del campo académico, pioneros serían los estudios de Miguel Valles y Alberto Moncada –*La juventud ante el trabajo*¹⁷⁷– el ya citado de José Ramón Torregrosa y otros –*Juventud, trabajo y desempleo*¹⁷⁸– o el de Pedro Ayerdi y Félix Taberna –*Juventud y empleo*¹⁷⁹–. Publicados todos ellos en la segunda etapa de la década de los ochenta, junto con el estudio también pionero del Colectivo IOE¹⁸⁰, o por aquellas mismas fechas el de Enric Sanchis –*De la escuela al paro*¹⁸¹–.

En la década de los noventa esta literatura se iría consolidando. Nos encontramos en unos años de transición en donde se produce una expansión cuantitativa y cualitativa. A nivel académico la tesis doctoral de Enrique Martín Criado –*Estrategias de juventud: Jóvenes, estudios, trabajos, clases sociales*¹⁸²– tendría una doble lectura. Primero, la de la entrada de estos estudios en el seno de las universidades. Segundo, aquella aportación inédita –tras el informe del Colectivo IOE, *Condiciones de trabajo de los jóvenes* unos años antes– iba a configurar las bases analíticas de una futura sociología de la juventud de corte crítico. Pero a su vez las investigaciones sobre mercado de trabajo y jóvenes trabajadores se va enriquecer desde otras perspectivas. La tesis de Esteban Agulló Tomás –*Juventud, trabajo e identidad: la centralidad del trabajo en el proceso de construcción de la identidad de los jóvenes*¹⁸³– desde la

¹⁷⁷ VALLES, Miguel, MONCADA, Alberto y CALLEJO, Manuel, *La juventud ante el trabajo. Nuevas actitudes en los 80. Tres ensayos*, Madrid, Popular, 1987.

¹⁷⁸ TORREGROSA, José Ramón, BERGERE, Joelle y ESTRAMIANA, José Luis A. (eds.), *Juventud, trabajo y desempleo...*, *op.cit.*.

¹⁷⁹ AYERDI, Pedro M^a y TABERNA, Félix, *Juventud y empleo. Una aproximación descriptiva*, Madrid, Popular, 1991.

¹⁸⁰ COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de], *Condiciones de trabajo...*, *op.cit.*; a destacar, igualmente: id., “Los jóvenes ante el trabajo: Cobayas de un nuevo modelo social”, *Documentación Social*, n° 75, (1989), pp. 191-203.

¹⁸¹ SANCHIS, Enric, *De la escuela al paro*, Madrid, Siglo XXI, 1991; id., “Desempleo y conflicto social: del malestar individual al silencio colectivo” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la...*, *op.cit.*, pp. 407-432.

¹⁸² Junto con, MARTÍN CRÍADO, Enrique, *Producir la juventud...*, *op.cit.*, véase, primero, su tesis, id., *Estrategias de juventud: Jóvenes, estudios, trabajos, clases sociales*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1993; y asimismo, id., “Economías morales de las relaciones laborales en grupos de trabajadores jóvenes”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n° 29-30, (1995), pp. 143-151; y, id., “Los empleos y los paros de los jóvenes”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, n° 11, (1997), pp. 174-201.

¹⁸³ AGULLÓ TOMÁS, Esteban, *Jóvenes, trabajo e...*, *op.cit.*.

psicología del trabajo, vendría, a su vez, a aportar un enfoque escasamente trabajado hasta entonces.

Aunque la posible influencia del *Informe Petras*, a buen seguro, no fuera determinante a nivel académico, lo cierto es que durante la segunda mitad de los años noventa esta temática cobraría un inusitado interés investigador. En dicho sentido, dos obras coordinadas –desde una perspectiva interdisciplinar– por Lorenzo Cachón serían determinantes en la consolidación de esta temática –*Juventudes, mercados de trabajo y políticas de empleo* y *Juventud y empleos*, respectivamente¹⁸⁴–. De hecho, se pasará de ediciones menores a proyectos de investigación avalados por reputadas revistas, así por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Ministerio de Trabajo e inclusive el propio Instituto de la Juventud, por más que en este último caso mal casen dichas publicaciones con lo que vienen a contar en sus propios *informes de juventud*. Un ejemplo, de lo anterior serían los propios trabajos acerca de las transiciones laborales de la juventud de Esperanza Roquero¹⁸⁵, los siempre valiosos textos de Joaquim Casal Bataller¹⁸⁶ así como las aportaciones de Luis Garrido y Miguel Requena¹⁸⁷, M^a Isabel García Espejo¹⁸⁸ o M^a Rosario Álvarez González y M^a José Azofra¹⁸⁹.

Sin embargo, será durante la siguiente década que inaugura el nuevo siglo cuando se puede hablar del pequeño-gran *salto delante* de este tipo de estudios. Además, con una doble característica: primero, por la multiplicidad temática, y segundo, por su práctica extensión a todas las ramas del conocimiento. También será en este tiempo cuando las investigaciones –tanto cuantitativas como cualitativas– en torno a la precariedad laboral juvenil cobren entidad propia. Investigaciones de muy desigualdad calidad y con enfoques dispares. Además de trabajos como los de Carlos Obeso¹⁹⁰, David Sempere y Jordi Serrano¹⁹¹, Antonio Antón¹⁹² –un

¹⁸⁴ CACHÓN, Lorenzo (dir.), *Juventudes, mercados de trabajo...*, op.cit.. Con trabajos tan destacados como los siguientes: CASAL BATALLER, Joaquim, “Modalidades de transición profesional y precarización del empleo” (pp. 171-179); SANTOS ORTEGA, Antonio, “La juventud va bien. La cuestión juvenil en la era de la precariedad laboral” (pp. 133-151). Asimismo, id. (dir.), *Juventud y empleos: perspectivas comparadas*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2000.

¹⁸⁵ ROQUERO, Esperanza, *La inserción a la vida activa*, Granda, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1995. En esta misma línea, consúltese también, BAIZÁN MUÑOZ, Pau, “La difícil integración de los jóvenes en la edad adulta”, *Documento de Trabajo de la Fundación Alternativas*, n° 33, (2003).

¹⁸⁶ CASAL BATALLER, Joaquim, “Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo XX”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 75, (1996), pp. 295-318. Y más recientemente, id., MERINO, Rafael y GARCÍA, Maribel, “Pasado y futuro del estudio sobre la transición de los jóvenes”, *Papers*, vol. XCVI, n° 4, (2011), pp. 1139-1162.

¹⁸⁷ GARRIDO, Luis y REQUENA, Miguel, *La emancipación de los jóvenes en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / Instituto de la Juventud, 1996.

¹⁸⁸ GARCÍA ESPEJO, M^a. Isabel, *Recursos formativos e inserción laboral de jóvenes*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1998.

¹⁸⁹ ÁLVAREZ GONZÁLEZ, M^a Rosario y AZOFRA, M^a José, *Economía y juventud*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1999.

¹⁹⁰ OBESO, Carlos, *Desempleo y precarización del mercado de trabajo en España*, [Barcelona], ESADE, 1997.

¹⁹¹ SEMPERE, David y SERRANO, Jordi (dirs.), *La juventud y el mercado de trabajo en España*, Barcelona, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, 2000.

¹⁹² ANTÓN, Antonio, *Precariedad laboral e identidades juveniles*, Madrid, GPS, 2006. Asimismo, desde otro enfoque, OBSERVATORIO DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 2008 [GARCÍA-MONTALVO y PEIRÓ, José M^a], *Análisis de la sobrecualificación y la flexibilidad laboral*, Valencia, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 2008. También, SALA, Guillem, PLANAS COLL, Jordi y ROMPAEY, Erika van, “¿Trabajan los jóvenes donde «deberían»? Especialidad

caso singular, al enfocar dicha problemática desde un ángulo sindical– Germán Gil Rodríguez¹⁹³, Miguel Laparra¹⁹⁴, Arturo Damián Sanchís Serra¹⁹⁵, José Luis Carretero Miramar¹⁹⁶ o las contribuciones de primer nivel de Esteban Sánchez Moreno¹⁹⁷, así como desde el derecho del trabajo de Henar Álvarez Cuesta¹⁹⁸... importantes revistas científicas comienzan a plantear y a publicar dossier monográficos¹⁹⁹. Publicaciones que se complementan con no pocos trabajos a *píe de obra* como el de Pablo López Calle y Juan José Castillo, *Los hijos de las Reformas Laborales*, que viene a recoger una tradición de investigación cualitativa ya consolidada e iniciada por el Colectivo IOE o el propio James Petras²⁰⁰. Tampoco faltarán los informes institucionales como el ya citado del Consejo Económico y Social –*El papel de la juventud en el sistema productivo español*²⁰¹–. Como tampoco faltarán los cada vez más frecuentes estudios sobre los modelos biográficos laborales precarios con trabajos de tanta trascendencia como el colectivo coordinador por Andreu López Blasco y Jesús Hernández Aristu²⁰², M^a Eugenia Cardenal de la Nuez –con su significativo trabajo titulado, *El paso a la vida adulta*²⁰³– o la propia tesis doctoral de Elsa Santamaría López –*Trayectorias laborales en*

de formación, especialidad de empleo y resultados de inserción”, *Sociología del Trabajo*, nº 70, (2010), pp. 87-106.

¹⁹³ GIL RODRÍGUEZ, Germán, *Jóvenes ante la nueva economía: contradicciones entre la evolución del trabajo y la oferta educativa*, Valencia, ISO [2006].

¹⁹⁴ LAPARRA, Miguel, *La construcción del empleo precario: dimensiones, causas y tendencias de la precariedad laboral*, Madrid, Cáritas / Fundación FOESSA, 2007.

¹⁹⁵ SANCHÍS SERRA, Arturo Damián, *Condiciones del mercado global de empleo: hacia la precariedad generalizada*, [Albacete], Liber Libro [2009].

¹⁹⁶ CARRETERO MIRAMAR, José Luis, *Contratos temporales y precariedad*, Madrid, Confederación Sindical Solidaridad Obrera, 2007.

¹⁹⁷ SÁNCHEZ MORENO, Esteban, “Jóvenes: la nueva...”, *op.cit.*; y, id. y DELICADO LOSA, Carmen, *Temporalidad en el empleo y mercado de trabajo para los jóvenes en España*. Dossier monográfico, *OBJOVEM*, nº 2, (2007).

¹⁹⁸ ÁLVAREZ CUESTA, Henar, *La precariedad laboral: análisis y propuestas de solución*, Albacete, Bomarzo, 2008.

¹⁹⁹ En primer lugar véanse los números monográficos de *Inguruak* –nº 32, (2002)– y de *Rescaldos*. *Revista de Diálogo Social* –nº 9, (2003), titulado: *Trabajo(s), empleo(s), precariedad*–. Y asimismo, ETXEBARRETA, Miren (coord.), “Del pleno empleo a la plena precariedad”, *Seminari d’Economia Crítica TAIFA*, nº 3, (2006); y, especialmente el amplio dossier, GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la...*, *op.cit.*; Finalmente desde una perspectiva de género: PRECARIAS A LA DERIVA, *A la deriva: por los circuitos de la precariedad femenina: precarias a la deriva*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004.

²⁰⁰ LÓPEZ CALLE, Pablo y CASTILLO, Juan José, *Los hijos de las Reformas Laborales. Trabajo, formación y vivienda de los jóvenes en la Comunidad de Madrid*. Madrid, UGT-Madrid, octubre de 2004; y también, LÓPEZ CALLE, Pablo, *La desmovilización general...*, *op.cit.*.

²⁰¹ CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, *El papel de...*, *op.cit.*.

²⁰² LÓPEZ BLASCO, Andreu y HERNÁNDEZ ARISTU, Jesús (comps.), *Jóvenes más allá del empleo: estructuras de apoyo a las transiciones*, Valencia, NAU Llibres, 2001. Véase también: VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando (dir.) y ORTEGA ALONSO, Elena, *De los recursos a los sujetos: Análisis de las micropolíticas de inserción laboral de jóvenes en España*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2003.

²⁰³ CARDENAL DE LA NUEZ, M^a Eugenia, *El paso a la vida adulta: dilemas y estrategias ante el empleo flexible*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006. En esta misma línea: TOHARIA, Luis, DAVIA RODRÍGUEZ, M^a Ángeles y HERNANZ MARTÍN, Virginia, *Flexibilidad, juventud y trayectorias laborales en el mercado de trabajo español. Una explotación del estudio 2321 del Centro de Investigaciones Sociológicas*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001; y, JIMÉNEZ ROGER, Beatriz [et al.], *La emancipación precaria: transiciones juveniles a la vida adulta en España a comienzos del siglo XXI*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008.

los márgenes del empleo²⁰⁴— junto con otros tantos. Asimismo continuará el *goteo* de estudios — la mayoría estadísticos-descriptivos— desde el Instituto de la Juventud en torno a aspectos tan diversos como los salarios, la demografía o las propias condiciones de vida²⁰⁵.

Pero de la misma forma que se puede observar este continuo *flujo* de publicaciones relacionadas con la economía, las relaciones y transiciones laborales, será también en esta última década cuando junto al interés por las interpretaciones de la ciudadanía en relación a la juventud²⁰⁶, culmine con notable éxito el *giro culturalista posmoderno*. En esta sentido, las obras de Carles Feixa se han constituido en el referente central. A partir de un relato *amable* a la vez que no *conflictivo*, y desde una narración bien construida, se ha reforzado el *canon dominante* sobre los estudios de la juventud. Así libros como *De jóvenes, bandas y tribus* o *Culturas juveniles*, se convertiría en la referencia central en este giro que ha desvinculado definitivamente la cuestión de la juventud del mundo del trabajo a nivel académico. Así resulta que se habla de precariedad —en términos metafóricos antes que materialistas— pero no de trabajo, de *tribus urbanas* pero no de *clases sociales* y otras tantas alegorías con las que rodear la conflictiva relación capital-trabajo. En gran medida, obras como las de Feixa suponen el correlato final de una transición entre paradigmas, que en cualquier caso, tardarían mucho más tiempo en imponerse de lo habitualmente considerado²⁰⁷.

²⁰⁴ SANTAMARÍA LÓPEZ, Elsa, *Trayectorias laborales en los márgenes del empleo: Experiencias de precariedad en los procesos de construcción identitaria*, Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco, 2009. Otras dos tesis doctorales en este mismo sentido en: FIERRO ARIAS, José Daniel, *La transición de la adolescencia a la edad adulta: teorías y realidades*, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2009; y, GARCÍA MONTERO, José Manuel, *Estrategias de inserción laboral: una aproximación sociológica de transición a la vida adulta a través de las redes sociales*, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2011. Véanse también: WAISGRAIS, Sebastián y CALERO, Jorge, “¿Qué determina los procesos de transición al mercado de trabajo?: un análisis aplicado al caso español”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 71, (2008), pp. 35-51; MUÑOZ de BUSTILLO LLORENTE, Rafael, ANTÓN PÉREZ, José Ignacio, BRAÑA PIÑO, Francisco Javier y FERNÁNDEZ MACÍAS, Enrique, *Abandono escolar y mercado de trabajo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009. Y desde otra perspectivas: TRILLO PÁRRAGA, Francisco José, *La construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales*, Valladolid, Lex Nova, 2010; y, el interesante dossier monográfico titulado: “La transición a la vida activa”, *Revista de Educación*, nº 351, (2010).

²⁰⁵ Junto con otros estudios ya citados, LÓPEZ BLASCO, Andreu [et al.], *Indicadores sociales europeos básicos sobre juventud*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2001; MORAL, Félix, *Las condiciones de vida de los jóvenes desempleados*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2002; HIDALGO VEGA, Álvaro y PÉREZ CAMARERO, Santiago, *Aspectos salariales de...*, *op.cit.*; PÉREZ CAMARERO, Santiago, HIDALGO VEGA, Álvaro y CALDERÓN, M^a José, *La economía de las personas jóvenes*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2006; NAVARRETE, Lorenzo (dir.), *Jóvenes adultos y consecuencias demográficas, 2001/2005*, Madrid, Instituto de la Juventud, [2006].

²⁰⁶ A las ya citada obra colectiva de, BENEDICTO, Jorge y MORÁN, M^a Luz. *La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2002; y también, id. y id., (eds.), *Aprendiendo a ser...*, *op.cit.*. Por otro lado, MEGÍAS, Eusebio (coord.), *Jóvenes y política: el compromiso de lo colectivo*, Madrid, Instituto de la Juventud / Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2005. Al mismo tiempo, ha de señalarse en este mismo ámbito los trabajos procedentes de la psicología como el de, FOUCE FERNÁNDEZ, José Guillermo, *Juventud y participación sociopolítica en la década de los 90*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2002, que va a venir a continuar la senda abierta años atrás por, BERGUERE DEZAPHI, Joelle, *Las actitudes ideológicas-políticas de los trabajadores en situación de desempleo. Un estudio de casos*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1989. A lo que se tendría que añadir trabajos colectivos como el de, RUIZ MIGUEL, Alfonso (ed.), *Jóvenes y compromiso ciudadano*, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2009. Por último, y desde una infrecuente perspectiva histórica, GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (ed.), *Juventud y política en la España contemporánea*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 59, (2005).

²⁰⁷ FEIXA, Carles, *De jóvenes, bandas...*, *op.cit.*; id. (coord.), *Culturas juveniles (1960-2004)*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2003. Unos años antes publicaría, *Joventut com a metàfora. Sobre les cultures juvenils*, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993. En esta misma línea: MACHADO PAÍS,

2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinares

Se ha insistido de forma repetida que uno de los grandes éxitos –sin cursivas ni comillas– de los ejecutivos socialistas se fundaría en el control del orden social así como en evitar el estallido de un conflicto obrero-social generalizado. Todo un logro político y económico a la vez. No han faltado, desde entonces, las explicaciones de todo tipo. Quizás una de las más certeras sería la proporcionada por el sociólogo liberal Víctor Pérez Díaz cuando hablaba de la *sociedad de las cuatro esquinas*:

«Ahora sólo quiero llamar la atención del lector acerca de una de las razones por las que España ha sido capaz de (sobre)-vivir en estas condiciones durante tanto tiempo y sin un estallido social. Entre otras razones había que tener en cuenta la experiencia [...] de la ‘sociedad de las cuatro esquinas’, tomando como metáfora de referencia un juego infantil. Se trata de la curiosa alternancia de muchas gentes, sobre todo jóvenes, entre cuatro estaciones: la ocupación de un puesto de trabajo ‘en precario’; la ocupación en la economía subterránea; el paro en condición de recibir subsidios de un tipo y otro; el aterrizaje en un puesto estable; a falta de todo lo cual, queda el individuo en el centro de la escena, en condición de pato propiamente dicho, puro y duro, viendo a los otros correr en una esquina a la otra»²⁰⁸.

Ahora bien, en este trabajo de investigación hasta llegar a las propias conclusiones de Pérez Díaz –debatibles y criticables como cualquier otra– se partiría –de cara a proporcionar una perspectiva histórica del cambio social bajo los gobiernos socialistas– de lo aportado por la literatura sociológica. Conviene detenerse, primero, en los razonamientos de tipo teórico. Ahí están los libros clásicos como los firmados por Robert Nisbet, Thomas S. Kuhn y Synn White²⁰⁹ pasando por los de Shmanuel N. Eisenstadt²¹⁰, todos ellos procedentes de la escuela liberal. También serían de una enorme utilidad libros desde un enfoque progresista como los de Ulrich Beck, Anthony Giddens y Scott Lash más apegados a nuestro tiempo –*Modernización reflexiva*²¹¹– o visiones desde la sociología histórica como los de Mercedes Alcañiz Moscardó²¹² pero sobre todo el de Andrés de Francisco²¹³.

José, *Chollos, chapuzas, changas: jóvenes, trabajo precario y futuro*, Barcelona, Anthropos, 2007. Una contravisión: MONTESINOS, David P., *La juventud domesticada: cómo la cultura juvenil se convirtió en simulacro*, Madrid, Popular, 2007. Ténganse aquí también presentes, MARTÍN SERRANO, Manuel (dir.), *Historia del cambio de mentalidades de los jóvenes entre 1960-1990*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1994; y MIGUEL, Amando de (dir.), *Dos generaciones de jóvenes (1960-1998)*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2000; o, por último, CANTERAS MURILLO, Andrés, *Sentidos, valores y creencias de los jóvenes*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2002.

²⁰⁸ PÉREZ DÍAZ, Víctor, *España puesta a prueba, 1976-1996*, Madrid, Alianza, 1996, p. 61. Véase aquí también, SALIDO CORTÉS, Olga y MORENO FERNÁNDEZ, Luis, “Bienestar y políticas familiares en España” en *Las nuevas formas...*, op.cit., pp. 101-114.

²⁰⁹ NISBET, Robert., KUHN, Thomas S. WHITE, Lynn [et al.], *Cambio social*, Madrid, Alianza, 1988. Consúltese aquí igualmente uno de los trabajos básicos en, BOUDON, Raymond, *Theories of Social Change*, Cambridge, Polity Press, 1991.

²¹⁰ EISENSTADT, Shmuel N., *Ensayos sobre el cambio social y la Modernización*, Madrid, Tecnos, 1970; id., *Modernización. Movimientos de protesta y cambio social*, Buenos Aires, Amorrortu, 1968.

²¹¹ BECK, Ulrich, GIDDENS, Anthony y LASH, Scott, *Modernización reflexiva: política, tradición y estética en el orden social*, Madrid, Alianza, 1997.

²¹² ALCAÑIZ MOSCARDÓ, Mercedes, *Cambio Social*, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I [2006]. También en castellano la traducción de la obra del profesor belga, BAJOIT, Guy, *El cambio social: análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas*, Madrid, Siglo XXI, 2008.

²¹³ FRANCISCO, Andrés de, *Sociología y cambio social*, Barcelona, Ariel, 1997.

Sin salirnos del marco teórico, por el momento, los estudios sobre conceptos tan heterogéneos como problemáticos –y con una clara connotación ideológica– como es el de “modernización”, se convertirían en esenciales de cara a dotarnos del necesario marco explicativo. Todo ello con el objetivo de adentrarnos en la muy particular proyección –cuando no evidente instrumentalización– programática-ideológica que los socialistas españoles harían del mismo. Una tarea, por cierto, rara vez emprendida. En este sentido, han de recalcarse importantes contribuciones en castellano como sería el libro colectivo editado por Teresa Carnero Arbat –*Modernización, desarrollo político y cambio social*²¹⁴– el de Carlota Solé –*Modernidad y modernización*²¹⁵– o los trabajos de Félix Ortega –*Las contradicciones sociales de la modernización*²¹⁶–. Sin olvidarnos de trabajos tan clarificadores como los proporcionados, una vez más, por el Colectivo IOE –*La ideología de la modernización o la parábola del asno y la zanahoria*²¹⁷–.

Por otro lado, se hacía necesario también tener presente –dado el contexto y la propia temática de la investigación– los estudios que se han centrado en los modelos de desarrollo político y social. Estudios que abordarían en su día las diferentes problemáticas y dilemas, a las que se enfrentarían una serie de países su tránsito de regímenes dictatoriales a regímenes democráticos de mercado, durante la década de los setenta. Por más que se pueda estar de acuerdo o no con sus conclusiones ahí estaba la obra de Juan J. Linz, *Crisis, breakdown and reequilibration*²¹⁸ y años más tarde la de Samuel P. Huntington, *La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX*²¹⁹. Como también han de citarse libros de cuya valía apenas hoy se recuerda incluso su título: en primer término, la aportación marxista de Nicos Poulantzas –*La crisis de la dictaduras*²²⁰– o directamente una de las grandes contribuciones de José Vidal Beneyto: *Del franquismo a una democracia de clase*²²¹. A sumar a lo anterior, recientes títulos como el completo estudio de Ignacio Amate Fortes y Almudena Guarnido Rueda –*Factores determinantes del desarrollo económico y social*²²²–.

Bajando ahora al terreno de los datos y de las propias realidades sociales, la serie de los *Informes FOESSA* –tanto el publicado en 1981 como en 1994, es decir el cuarto y quinto informe, respectivamente²²³– junto con trabajos colectivos de gran envergadura como los

²¹⁴ CARNERO ARBAT, Teresa (ed.), *Modernización, desarrollo político y cambio social*, Madrid, Alianza, 1992.

²¹⁵ SOLÉ, Carlota, *Modernidad y modernización*, Barcelona / México D.F., Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana, 1998.

²¹⁶ ORTEGA, Félix, *Las contradicciones sociales de la modernización*, Madrid, EDESA, 1990; y id., “La modernización social como mito”, *Claves de Razón Práctica*, nº 41, (1994), pp. 44-52.

²¹⁷ COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de], “La ideología de...”, *op.cit.*

²¹⁸ LINZ, Juan José, *Crisis, breakdown and reequilibration*, Baltimore, The John Hopkins University, 1988, vol. I, *The breakdown and democratic regimes*.

²¹⁹ HUNTINGTON, Samuel P., *La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX*, Barcelona, Paidós, 1994.

²²⁰ POULANTZAS, Nicos, *La crisis de las dictaduras: Portugal, Grecia, España*, Madrid, Siglo XXI, 1976. Y también del mismo autor: id., *Las clases sociales en el capitalismo actual*, México, Siglo XXI, 1977.

²²¹ VIDAL-BENEYTO, José, *Del franquismo a una democracia de clase*, Madrid, Akal, 1977.

²²² AMATE FORTES, Ignacio y GUARNIDO RUEDA, Almudena, *Factores determinantes del desarrollo económico y social*, Málaga, Analistas Económicos de Andalucía, 2011.

²²³ FUNDACIÓN FOESSA [LINZ, Juan José (dir.)], *Informe sociológico sobre el cambio político en España 1975/1981: IV informe FOESSA*, Madrid, Euramérica, 1981, vol. I; y, FUNDACIÓN FOESSA [MURILLO FERROL, Francisco (dir.)], *Informe sociológico sobre el cambio social en España 1975/1983: IV informe FOESSA*, Madrid, Euramérica, 1981, vol. II; FUNDACIÓN FOESSA [JUÁREZ,

editados por Salustiano del Campo –*Tendencias sociales en España (1960-1990)*– siguen constituyendo referencias básicas para cualquier tipo de estudio sobre el cambio social en la España contemporánea²²⁴. Otro caso radicalmente diferente sería, primero, los estudios colectivos dirigidos por Vicenç Navarro²²⁵ o directamente la obra del Colectivo IOE –*Barómetro social de España*– a partir de una lectura crítica y alternativa de la propia realidad estadística²²⁶.

A nivel internacional los trabajos de Ronald Inglehart devienen en claves a la hora de descifrar la transformación global de los valores y mentalidades, a partir del empleo de la Encuesta Mundial de Valores (*World Values Survey*)²²⁷. Autor que ha asentado académicamente la conceptualización de los “valores postmaterialistas”. Una perspectiva que en España –principalmente a través del Centro de Investigaciones Sociológicas– ha tenido relevantes aportaciones de la mano de Francisco Andrés Orizo –*Sistema de valores en la España de los 90 y Los nuevos valores de los españoles: España en la encuesta europea de valores*²²⁸– a través de Mariano Torcal –*La dimensión materialista/postmaterialista en España: las variables del cambio cultural*²²⁹– los trabajos de José Juan Toharia –*Cambios recientes en la sociedad española*²³⁰– o las precursoras contribuciones de Rafael López Pintor²³¹. A lo anterior, ha de sumarse la obra colectiva dirigida por Eduardo Bericat Alastuey –*El conflicto cultural en España*²³²–.

Miguel (dir.), *V Informe sociológico sobre la situación social en España. Sociedad para todos en el año 2000*, II vols., Madrid, Fundación Foessa, 1994.

²²⁴ CAMPO, Salustiano del (dir.), *Tendencias sociales en España (1960-1990)*, III vols., Bilbao, Fundación BBV, 1993.

²²⁵ Véase lo apuntado en la *Presentación*, nota 127.

²²⁶ COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de, con la colaboración de MATEOS, Emma], *Barómetro social de...*, *op.cit.*. Consúltese también: ANALÍTICA S.L. (dir.), *Las desigualdades en España. Síntesis estadística*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1995.

²²⁷ INGLEHART, Ronald, *El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1991; y id., *Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1999. Véase también aquí: SILVESTRE CABRERA, Mª, “El grado de postmaterialismo” en ELZO, Javier (coord.), *Los valores en la sociedad vasca: su evolución en los años 1990-1995*, Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996, pp. 255-282.

²²⁸ ANDRÉS ORIZO, Francisco, *Sistema de valores en la España de los 90*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2001; y también, id., *Dinámica intergeneracional en el sistema de valores españoles*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995. Y más concretamente: id., *Los nuevos valores de los españoles: España en la encuesta europea de valores*, Madrid, Fundación Santa María / SM, 1991.

²²⁹ TORCAL, Mariano, “La dimensión materialista/postmaterialista en España: las variables del cambio cultural”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 47, (1989), pp. 227-254; y, id., MORALES DIEZ de ULZURRUN, Laura y PÉREZ-NIEVAS MONTIEL, Santiago (eds.), *España: sociedad y política en perspectiva comparada: un análisis de la primera ola de la Encuesta Social Europea*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.

²³⁰ TOHARIA, José Juan, *Cambios recientes en la sociedad española*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1989; id. (coord.), *Pulso de España 2010: un informe sociológico*, Madrid, Biblioteca Nueva / Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 2011.

²³¹ LÓPEZ PINTOR, Rafael, *Las bases sociales de la democracia en España*, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia [1981]; id., *La opinión pública española del franquismo a la democracia*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982.

²³² BERICAT ALASTUEY, Eduardo (ed.), *El conflicto cultural en España: acuerdos y desacuerdos entre los españoles*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2003.

En el terreno de las interpretaciones, no pocas han sido las preguntas que han orientado, en lo básico, las principales investigaciones. Seleccionaremos tres. Primero, tras la época socialista, ¿la sociedad española era más o menos desigualdad social y económicamente? Segundo, ¿cómo se había distribuido la riqueza? Y, tercer término, ¿qué tipo de estado Bienestar se conformaría entre 1982 a 1996? A lo que se cabría añadirse un último interrogante: ¿cuál es el grado de convergencia de nuestra sociedad a nivel europeo?²³³ El predominio –nuevamente– de las visiones liberales –con dos claros subenfoques a su vez– es hoy una realidad consolidada a nivel académico²³⁴. La perspectiva liberal estricta y la liberal-social, tienen en común asumir como lógicos cuando no irremediables los propios costes sociales y humanos –y por tanto los diversos niveles de desigualdad alcanzados– tras la puesta en marcha el proyecto de modernización socialista. No obstante, mientras que para Carlos Alonso Zaldívar y Manuel Castells en su obra, *España, fin de siglo* –recuérdese la tesis del *salto adelante a modo de rana*²³⁵ –o directamente para el sociólogo José María Maravall –entre otras obras, *Los resultados de la democracia: un estudio del sur y del este de Europa*²³⁶ –observarán como los propios procesos de modernización impulsados por los partidos socialistas conllevarían importantes progresos materiales –tanto a nivel económico y social– a un nivel social generalizado, pese a sus más que evidentes costes en materia de desempleo, retraso social y mal reparto de la riqueza creada. Por otro lado, autores plenamente liberales como Jesús M. de Miguel²³⁷ o el propio Víctor Pérez Díaz²³⁸, coincidiendo en lo básico en el diagnóstico, achacarían esos mismos resultados, o bien, a la falta de un mayor grado de liberalización, o bien, directamente a la falta de una estrategia definida a medio-largo plazo de modernización total de la sociedad española, entre otras críticas de relieve

Frente a las anteriores visiones, las obras de Vicenç Navarro²³⁹, el Colectivo IOE²⁴⁰ y otros²⁴¹ –como venimos remarcando desde páginas anteriores– por el contrario han tendido a

²³³ Visiones generales: GONZÁLEZ, Juan Jesús y REQUENA, Miguel (eds.), *Tres décadas de...*, op.cit.; BERICAT ALASTUEY, Eduardo (coord.), *El cambio social en España*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2006.

²³⁴ Véase la crítica al respecto, CASTRO, Carles, “La minoría dominante: la derrota de la mayoría sociológica”, *Claves de Razón Práctica*, nº 194, (2009), pp. 64-67.

²³⁵ ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, op.cit..

²³⁶ MARAVALL, José M^a, *Los resultados de la democracia: un estudio del sur y del este de Europa*, Madrid, Alianza, 1995. A sumarse a los siguientes trabajos: id., “What is Left? Social Democratic policies in Southern Europe”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 36, (1992); id., “Politics and Policy: Economic Reforms in Southern Europe” en PEREIRA, Luis Carlos, id. y PRZEWORKSKI, Adam, *Economic Reforms in New Democracies. A social-Democratic Approach*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 77-131. Y, por último, para acercarse a la óptica socialdemócrata sobre el citado debate, id., (ed.), *Dimensiones de la desigualdad: III simposio sobre igualdad y distribución de la renta y la riqueza*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1999, vol. I; y años más tarde: ÁVILA FRANCÉS, Juan [et al.], *Estado de bienestar y socialdemocracia. Ideas para el debate*, Madrid, Alianza, 2001.

²³⁷ MIGUEL, Jesús M. de, *Estructura y cambio social en España*, Madrid, Alianza, 1998.

²³⁸ PÉREZ DÍAZ, Víctor, *España puesta a...*, op.cit.. Sus aportaciones al respecto son numerosas. A destacar: id., *El retorno de la sociedad civil. Respuestas sociales a la transición política, la crisis económica y los cambios culturales de España, 1975-1985*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987; id., *La primacía de la sociedad civil. El proceso de formación de la España democrática*, Madrid, Alianza, 1993; id., *La cultura de la ciencia y la convergencia de España con los países avanzados*, Madrid, Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, 2006. En similar línea, ALVAREZ-MIRANDA, Berta [et al.], *Dilemas del estado de bienestar*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1996; y un tiempo más tarde, PÉREZ DÍAZ, Víctor, CHULIÁ, Elisa y ALVAREZ-MIRANDA, Berta, *Familia y sistema de bienestar: la experiencia española con el paro, las pensiones, la sanidad y la educación*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1998.

²³⁹ Véase lo apuntado en la nota 225.

resaltar no sólo las insuficiencias de los supuestos “logros” conseguidos, sino que han evidenciado –de forma empírica y en ocasiones de forma difícilmente rebatible– las consecuencias sociales y económicas de la política económica, social, laboral e igualitaria de los ejecutivos socialistas. Insisten, estos últimos en el muy insuficiente Estado del Bienestar, el incremento de la desigualdad social y los procesos de exclusión social²⁴². Fenómenos, según estos mismos autores, que caracterizarían a este periodo histórico.

Por lo demás, a modo de ejemplo, habría que destacar los trabajos que se han interrogado sobre un problema estructural económico a la par que social en el caso español: las políticas de protección de desempleo en un país con altas tasas de paro de larga duración. Estudios, por lo general, que han mostrado los muy bajos niveles de protección, a partir de los sucesivos recortes garantistas y protectores desde la transición a la democracia en adelante²⁴³.

²⁴⁰ Véase lo apuntado en la *nota* 226.

²⁴¹ En primer lugar, nos remitimos a los trabajos coordinador por, RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, *El gasto público en servicios sociales en España (1972-1988): aproximación a su estructura, cuantificación y análisis desde la perspectiva del bienestar social a través de las asignaciones presupuestarias*, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1990; id. (comp.), *Estado, privatización y bienestar...*, *op.cit.*. Enfoques similares en: FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás y GARCÉS FERRER, Jorge (coords.), *Crítica y futuro del Estado del Bienestar: reflexiones desde la izquierda*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999; ADELANTADO, José (coord.), *Cambios en el Estado del Bienestar: políticas sociales y desigualdades en España*, Barcelona, Icaria / Universitat Autònoma de Barcelona, 2000. Otras visiones en: MORENO FERNÁNDEZ, Luis y PÉREZ YRUELA, Manuel (comps.), *Política social y estado del bienestar*, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1995 [Ponencias del I Seminario Internacional de Política Social “Gumersindo de Azcárate” celebrado en Madrid en 1990]; GONZÁLEZ TEMPRANO, Antonio (dir.), *La consolidación del estado del bienestar en España, 1993-2000*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003; MORENO FERNÁNDEZ, Luis y SARASA URDIOLA, Sebastián (comps.), *El Estado del Bienestar en la Europa del Sur*, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1995; y id. (ed.), *Reformas de las políticas del bienestar en España*, Madrid, Siglo XXI, 2009. También, nos remitimos al dossier monográfico titulado: “Estado del Bienestar y Política Social”, *Política y Sociedad*, vol. XLIV, nº 2, (2007). Y, por último, a un nivel teórico, ESPADAS ALCÁZAR, M^a Ángeles, “Las relaciones Estado-Ciudadanos en la reestructuración del Bienestar: revisión conceptual para un análisis crítico de la Política Social”, *Cuadernos de Trabajo Social*, nº 20, (2007), pp. 167-188.

²⁴² Junto con la bibliografía ya apuntada anteriormente, véase, entre otros muchos: GIL, Fernando, *La exclusión social*, Barcelona, Ariel, 2002; TEZANOS, José Félix (eds.), *Tendencias en desigualdad y exclusión social*, 2^a ed., Madrid, Sistema, 2004; SUBIRATS, Joan (dir.), GOMÀ CARMONA, Ricard y BRUGUÉ TORRUELLA, Joaquim (coords.), *Análisis de los factores de exclusión social*, Bilbao, Fundación BBVA / Institut d’Estudis Autnòmics, 2005; VILLALÓN OGÁYAR, Juan José, *Identidades sociales y exclusión: ¿qué nos diferencia? ¿qué nos iguala? España, 1985-2004*, Madrid, Fundación FOESSA, 2006. Y asimismo el dossier monográfico de la *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, nº 75, (2007). También consúltese el muy relevante informe del, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, *La pobreza y la exclusión social en España*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1997.

²⁴³ La bibliografía en este mismo terreno es abundante y procede muy diferentes campos de las ciencias económicas y sociales. Entre otros muchos trabajos nos limitaremos a señalar los siguientes: PONZ, Juan Miguel y TAGUAS, David, “Temporalidad y tasa de cobertura del desempleo en la economía española”, *Documento de Trabajo. Ministerio de Economía y Hacienda*, nº D-95001, (1995); BOVER, Olympia, ARELLANO, Manuel y BENTOLILA, Samuel, “Duración del desempleo, duración de las prestaciones y ciclo económico”, *Estudios Económicos. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 57, (1996); CEBRIÁN, Inmaculada, GARCÍA, Carlos, MURO, Juan, TOHARIA, Luis y VILLAGÓMEZ, Elizabeth, *Protección social y acceso al empleo: un estudio de los perceptores por desempleo*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996; GARCÍA BROSA, Gemma, *Prestaciones por desempleo y duración del paro*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996; COLLADO GARCÍA, Luis, *El subsidio por desempleo: un estudio del nivel asistencia de protección*, Madrid, Trotta, 1997; MARTÍ SEMPERE, Mónica, *El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992): estimación de sus efectos sobre la probabilidad de transición desde el paro a la ocupación*, Alicante, Universidad de Alicante, 1998; ARANGO FERNÁNDEZ, Jesús, *La protección por desempleo en España*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1999; TOHARIA, Luis y CANTÓ SÁNCHEZ, Olga, “Las prestaciones por desempleo en España: eficiencia y equidad” en *Las nuevas fronteras de la protección social: Eficiencia y*

En resumen, nos encontramos ante un debate abierto y sujeto a diversas interpretaciones radicalmente distantes entre sí, y que a su vez abordan la delicada cuestión de la legitimidad o no del Estado Social²⁴⁴.

Por lo demás, y tal y como hemos avanzado en más de una ocasión, el cambio más trascendente –a nuestro juicio– tanto a nivel epistemológico como académico de estas últimas décadas, ha sido el proceso de *invisibilización* del conflicto social, tanto a nivel epistemológico como a nivel de herramienta de análisis. Aparte de lo mencionado en la *Presentación* al respecto de la propia metamorfosis del conflicto en el seno de los centros de trabajo²⁴⁵, en el *capítulo 3* hablaremos largo y tendido de su traslación dentro del debate de la historia social y del propio movimiento obrero y sus ciclos de lucha; así como remarcaremos todas estas cuestiones en el *capítulo 9* a partir de nuestro estudio de caso, desde una perspectiva combinada a nivel nacional e internacional. En cualquier caso, se hace aquí necesario apuntar cuando menos algunas notas básicas.

En realidad nos encontramos ante un fenómeno doble: por un lado, la citada *invisibilización del conflicto* y su sustitución por paradigmas consensualistas, que han pretendido ofrecer “nuevas” respuestas a través de unos relatos en donde el propio conflicto apenas tendría trascendencia social y menos histórica; y segundo, resulta del todo evidente la transformación de este “vieja categoría” en otras nuevas, del tipo de acciones colectivas, más vinculadas a términos de identidad y culturales antes que leída en términos de clase. Las razones estructurales –e inclusive supraestructurales– y las razones político-académicas ya se han delineado. Un fenómeno, en cualquier caso, que aquí se ha llevado hasta sus últimas consecuencias.

equidad en los sistemas de garantía de rentas. Dossier monográfico, *Hacienda Pública Española*, nº extraordinario (2003), pp. 125-156; SANCHIS, Enric, “La experiencia del paro”, *Política y Sociedad*, vol. XL, nº 1, (2003), pp. 161-184. TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel, *El nivel asistencial de protección por desempleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004; MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Protección social y empleo” en *Estado del bienestar: retos y opciones de reforma*. Dossier monográfico, *Quaderns de Política Econòmica*, nº 9, (2005). A destacar, de forma concreta, REBOLLO SANZ, Yolanda, *Influencia de la contratación temporal y las prestaciones por desempleo en el mercado laboral*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2008. Desde una perspectiva jurídica: DESDENTADO BONETE, Aurelio, “Las prestaciones de desempleo: 1974-1985”, *Información Comercial Española*, nº 630-631, (1986), pp. 152-164; MONEREO PÉREZ, José Luis, *Las nuevas políticas de protección por desempleo y su reflejo en el sistema jurídico*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003; CAVAS MARTÍNEZ, Faustino y FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier, “La protección social por desempleo en el sistema constitucional de relaciones laborales” en SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente (dir.) y MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Rodrigo (coord.), *El modelo social en la Constitución española de 1978*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, pp. 911-960; QUESADA SEGURA, Rosa, *Los principios constitucionales y el modelo legal de protección por desempleo*, Sevilla, Mergablum, 2004. Y bajo un enfoque comparativo a nivel europeo: MÁRQUEZ PRIETO, Antonio, *La protección por desempleo en España y en otros estados europeos*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001; y tiempo antes, FERNÁNDEZ MORENO, Marta, “El gasto en protección en los países de la Unión Europea durante el periodo 1980-1991”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 21-22, (1993), pp. 192-202. A pesar de que se incidirá en siguientes capítulos sobre esta misma cuestión, véase un completo informe sobre los parados de larga duración en, ALBA RAMÍREZ, Alfonso, ÁLVAREZ LLORENTE, Gema y PAGÁN RODRÍGUEZ, Ricardo, *Parados de larga duración: ¿cuántos son, quiénes sin, qué tipo de empleo buscan y cuánto tardan en encontrar trabajo?* Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999. Una visión internacional comparativa: GALLIE, Duncan, MARSH, Catherine y VOGLER, Carolyn (eds.), *Social Change and the Experience of Unemployment*, Oxford, Oxford University Press, 1994.

²⁴⁴ Véase, por ejemplo, la tesis doctoral de, CALZADA GUTIÉRREZ, Inés, *La tela que nos teje: un estudio comparado de las bases que sustentan la legitimidad de las políticas de bienestar*, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 2008.

²⁴⁵ Véase *Presentación*, nota 119 y nota 120.

Vaya por delante, que en torno al conflicto obrero y social desde la perspectiva marxista han pesado no pocas imágenes pre-construidas, así como no pocos mitos fundacionales del movimiento obrero. Pues como recordó Daniel Lacalle:

«[N]i ahora ni nunca la huelga, ha sido o es el conflicto laboral normal en el capitalismo, ni tampoco el dominante, de hecho en toda la historia del movimiento obrero la huelga ha sido una herramienta extrema dentro de los límites estrictamente económicos y siempre ha partido y se ha visto acompañada de multitud de movilizaciones de todo tipo, es decir, lo que es normal en toda la historia del capitalismo es el trinomio negociación-movilización-huelga con diferentes grados y combinaciones en cada una de esas escalas»²⁴⁶.

Siendo esto así, lo cierto es que la mayor parte de las lecturas de nuestra historia contemporánea –ya sean estrictamente históricas, o bien, sociológicas, o bien políticas, o bien económicas– interpretarían el conflicto obrero durante el periodo de la transición, a pesar de su virulencia y de sus considerables dimensiones cualitativas y cuantitativas –por este mismo orden– como un factor menor explicativo de los resultados finales de la transición. Un proceso que se acentuaría en las siguientes décadas al calor del declive del protagonismo histórico del movimiento obrero. Resultado de ello no sólo ha sido la citada invisibilización del conflicto obrero-social, sino también de los procesos de violencia política que acompañaron a la década de los ochenta y los primeros años noventa en plena época socialista²⁴⁷. No significa esto, que no se haya hablado de huelgas, conflictos y demás movilizaciones; *significa*, que estos mismos procesos conflictivos se han examinado e interpretado metodológicamente de forma aislada –la mayor parte de las veces– y sin enfoques eminentemente teóricos. Lo que nos lleva, a lo que aquí queríamos destacar, la cada vez menor atención teórica a la propia noción del conflicto. Y claro está a la propia concepción de la lucha de clases.

Existe un corte cronológico harto significativo situado en la barrera de los años ochenta a nivel teórico. De hecho, pocas muy pocas obras del nivel de las publicadas en su día por de Ralf Dahrendorf –*Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial* (1979)²⁴⁸– por Walter Korpi –*The democratic class struggle* (1983)²⁴⁹– John Goldthorpe –*Orden y conflicto en el capitalismo moderno* (1984)²⁵⁰– o la obra de John Rex –*El conflicto social: un análisis conceptual y teórico* (1985)²⁵¹– se han vuelto a publicar. Todo ello sin olvidar otros tantos trabajos que vinieron a teorizar sobre la lucha de clases, término hoy prácticamente proscrito:

²⁴⁶ LACALLE, Daniel, “Conflictividad laboral y crisis”, *El Viejo Topo*, nº 278, (2011), pp. 55-56.

²⁴⁷ ARÓSTEGUI, Julio, “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia” en id. (ed.), *Violencia y política en España*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 13, (1994), pp. 17-56; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, ARÓSTEGUI, Julio y SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “La violencia política en la España del siglo XX”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 22, (2000), pp. 53-94; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, “El Estado ante la violencia” en JULIÁ, Santos (dir.), *Violencia política en la España del siglo XX*, Madrid, Taurus, 2000, pp. 365-406; y, CRUZ, Rafael, “La sangre en España. Lecturas sobre historia de la violencia política en el siglo XX”, *Ayer*, nº 46, (2002), pp. 285-293.

²⁴⁸ DAHRENDORF, Ralf, *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*, Madrid, Rialp, 1979; y también, id., *El conflicto social moderno: ensayo sobre la política de la libertad*, Madrid, Mondadori, 1990. Véase aquí también: RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, José E., “Legitimación y conflicto en las sociedades industriales avanzadas”, *Sistema*, nº 29-30, (1979), pp. 103-118.

²⁴⁹ KORPI, Walter, *The Democratic class struggle*, London, Routledge & Kegan Paul, 1983; id., “Powers Resources and Employer-Centered Approaches in Explanations of Welfare States and Varieties of Capitalism: Protagonists, Consenters and Antagonists”, *World Politics*, nº 58, (2006), pp. 167-206.

²⁵⁰ GOLDTHORPE, John, *Orden y conflicto en el capitalismo contemporáneo: estudios sobre economía política en los países de la Europa Occidental*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991 [1984]. Sobre su obra e influencia, GARCÍA DE POLAVIEJA, Javier, “Por una sociología científica: la obra de John Goldthorpe”, *Claves de Razón Práctica*, nº 201, (2010), pp. 71-76.

²⁵¹ REX, John, *El conflicto social: un análisis conceptual y teórico*, Madrid Siglo XXI, 1985.

desde los de José Ramón Recalde –*Integración y lucha de clases en el neocapitalismo*²⁵²– los de Carlos París –*La lucha de clases*²⁵³– e inclusive la desconocida aportación de André Gorz –*Técnica, técnicas i lluita de classes*²⁵⁴–; a lo que habría que sumar no pocas aportaciones desde el derecho del trabajo²⁵⁵.

Llegados aquí cabría preguntarse, tal y como lo formuló a su manera Alain Touraine²⁵⁶, sí en verdad, ¿han desaparecido los conflictos sociales de clase en estas últimas décadas? No, evidentemente, pues como explicó en su momento Nicolás Iñigo Carrera:

«Hace ya mucho tiempo que ha sido demostrado que los procesos históricos son resultantes de la confrontación entre las clases sociales, cuya base material la constituye el modo en que, en cada período histórico, los seres humanos reproducen su existencia»²⁵⁷.

Sin embargo, lo aquí nos parece de una lógica aplastante, no lo ha sido tanto en el terreno de las ciencias sociales, que con el declive del ciclo de las luchas de los setenta, pronto se apresurarían a formular las correspondientes tesis para hablar de la desaparición del conflicto obrero fabril, llegándose a límites impensables en no pocas ocasiones²⁵⁸.

Cuando se analiza pero ante todo se reflexiona en torno a las nuevas preocupaciones existentes sobre el conflicto social –o si prefiere en torno al concepto despolitizado de las acciones colectivas²⁵⁹– se hace, prácticamente, imprescindible *volver la mirada* a los clásicos, por más que en esta última década se puedan constatar aportaciones de interés e inclusive a autores como Antonio Negri que han aportado sobradas pruebas de lo que venía a plantear el historiador argentino Nicolás Iñigo Carrera²⁶⁰.

2.2.7. La cuestión generacional: debatiendo las *tesis consensualistas*

«La realidad de la interacción, y los fenómenos histórico-sociales a los que dan lugar las generaciones, nos hablan del ‘ritmo’ con el que los presentes históricos se mueven en el tiempo. No existe, pues, nada como una sucesión de los presentes generacionales que determinarían periodos históricos,

²⁵² RECALDE, José Ramón, *Integración y lucha de clases en el neocapitalismo*, Madrid, Ciencia Nueva, 1968.

²⁵³ PARÍS, Carlos, *La lucha de clases*, Madrid, Mañana, 1977.

²⁵⁴ GORZ, André, *Técnica, tècniques i lluita de classes*, Barcelona, La Magrana, 1979.

²⁵⁵ MONTORO BALLESTEROS, Alberto, *Conflicto social: derecho y proceso*, Murcia, Universidad de Murcia, 1980; y, KORSCH, Karl, *Lucha de clases y derecho del trabajo*, Barcelona, Ariel, 1980.

²⁵⁶ TOURAINE, Alain, *Un nuevo paradigma...*, *op.cit.*. Véase, en este sentido, el último libro, de COTARELO, Ramón, *El sueño de la verdad. Los conflictos en la sociedad abierta*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2012, y en concreto el apartado: “II. El ocaso de los proyectos revolucionarios en la posmodernidad” (pp. 22-34).

²⁵⁷ IÑIGO CARRERA, Nicolás, “El concepto de clase obrera y la resistencia a la precariedad” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la...*, *op.cit.*, pp. 444-445.

²⁵⁸ Por ejemplo, BAIGORRI, Artemio y FERNÁNDEZ DÍAZ, Ramón, *Botellón: un conflicto posmoderno*, Barcelona, Icaria, 2004.

²⁵⁹ Véanse, en cualquier caso, LORENZO CADARSO, Pedro L., *Fundamentos teóricos del conflicto social*, Madrid, Siglo XXI, 2001; ENTELMAN, Remo, F., *Teoría de conflictos: hacia un nuevo paradigma*, Barcelona, Gedisa, 2002; ALFARO VARGAS, Roy y CRUZ RODRÍGUEZ, Omar, “Teoría del conflicto social y posmodernidad”, *Revista de Ciencias Sociales*, n° 128-129, (2010), pp. 63-70.

²⁶⁰ NEGRI, Antonio, *Fábricas del sujeto/ontología de la subversión: antagonismo, subsunción real, poder constituyente, multitud, comunismo*, Madrid, Akal, 2006; y también, id., *La forma-estado*, Madrid, Akal, 2003.

sino el encabalgamiento temporal y la convergencia de historias entre las generaciones que se suceden y que en cada momento de su trayectoria conviven con otras. Al observar esta realidad, la categoría *presente histórico* está más cerca de poder materializada en historias concretas».

Julio ARÓSTEGUI, *La historia vivida*²⁶¹.

A partir de nuestro punto de partida investigador, indudablemente, nos interesa sobremanera adentrarnos en la cuestión de las generaciones. Ello desde una óptica eminentemente teórica como práctica. Cuando se procede a observar lo publicado desde las ciencias sociales, se puede verificar, a primera vista, el amplio empleo y recurso a la cuestión generacional. Eso sí, en la mayor parte de los casos sin marco teórico ni metodológico.

Así pues, la generación, las generaciones, han funcionado más bien como un adjetivo – metafórico o no– antes que como un concepto propio a nivel epistemológico. Esto obedece a varias razones. Desde la inusitada *alegría* con que se han llevado pocos análisis científicos, que han identificado de forma simplista a las *generaciones* con una franja de edad determinada en un tiempo concreto, añadiéndose a lo sumo alguna cita más o menos apropiada de Ortega y Gasset –especialmente a partir de la lectura de, *La rebelión de las masas*²⁶²–; hasta las propias dificultades que entraña su utilización cuando se aborda desde la propia complejidad que acarrea su uso. En relación a esta última circunstancia, sin prácticamente ningún género de dudas, ha influido la limitada bibliografía disponible a nivel teórico. Sin una referencia central no discutible –hasta tiempo muy reciente– de la que *tirar* en caso necesario, lo que estos mismos estudios han venido a describir es una problemática relación entre los acontecimientos sociales y el devenir generacional.

La cuestión generacional no comienza ni finaliza en el propio Ortega y Gasset. Muchos menos recordada –y por tanto menos empleada– sería unas de las obras más clarificadoras – dentro, insistimos, de esta complejidad descrita– en este terreno: *El problema de las generaciones* de Karl Mannheim, que redactada originalmente en 1928, su traducción al castellano llegaría con un enorme retraso²⁶³. Más allá de lo que se publicó en los años veinte del siglo XX, el núcleo teórico central se localiza en los años cuarenta del pasado siglo. Ahí están las aportaciones de Pedro Laín Entralgo²⁶⁴, pero ante todo del propio Julián Marías –seguidor y continuador de Ortega y Gasset–. Especialmente este último a través de *El método histórico de las generaciones*, ayudaría a definir las líneas de un debate siempre inacabado²⁶⁵. Desde entonces, en adelante, este interés –eminentemente teórico– disminuiría de forma considerable. A pesar de que años después se traducirían obras de la relevancia como las de Nerina Jansen – *La teoría de las generaciones y el cambio social*²⁶⁶– se asistiría en castellano, en la práctica, a una singular parálisis analítica.

²⁶¹ ARÓSTEGUI, Julio, *La historia vivida...*, *op.cit.*, pp. 110-111.

²⁶² ORTEGA y GASSET, José, *La rebelión de las masas. El tema de nuestro tiempo*, Madrid, El País, 2010 [1923] [también se sigue la edición, 40ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 2006, con introducción de Julián Marías]. Y sobre el empleo simplista del ‘criterio de edad’: VILLALÓN OGÁYAR, Juan José, “Las identidades sociales de los jóvenes españoles: la edad como elemento clave de división”, *Sistema*, nº 197-198, (2007), pp. 253-282.

²⁶³ MANNHEIM, Karl, “El problema de las generaciones”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 62, (1993) [1928], pp. 193-242.

²⁶⁴ LAÍN ENTRALGO, Pedro, *Las generaciones en la historia*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945.

²⁶⁵ MARÍAS, Julián, *El método histórico de las generaciones*, 4ª ed., Madrid, Revista de Occidente, 1967 [1949].

²⁶⁶ JANSEN, Nerina, *La teoría de las generaciones y el cambio social*, Madrid, Espasa-Calpe, 1977. Igualmente, consúltense otros libros publicados y que en su mayor parte serían traducidos durante

Pese a su escasa difusión dentro de nuestra academia hasta tiempo muy reciente –y siempre de forma limitada– desde los setenta hasta ahora un amplio conjunto de publicaciones anglosajonas vendrían a poner el acento en la cuestión generacional –incluida también la perspectiva juvenil–. Trabajos como el de Ted Goertzel –*Generational conflict and social change*²⁶⁷– los de Graham Murdock y Robin McCron –*Consciousness of class and consciousness of generation*²⁶⁸– o el conjunto de trabajos editados por Sara Arnes –*The myth of generational conflict*²⁶⁹– entre otros, ayudaron a redefinir no pocas barreras del conocimiento social al respecto. En francés, nuevamente, ha de citarse la obra clave de Louis Chavel, *Le Destin des générations*²⁷⁰. Aquí también se han de tener presentes las publicaciones en francés de, entre otros, Denis Kessler, André Masson o Claudine Attias-Donfut²⁷¹.

Su posible influencia, insistimos, ha sido parcial. Tan sólo en la última década se ha retomado en castellano cierta atención. En su mayor parte, han sido contribuciones en forma de artículos científicos antes que en forma de monografías como pudiera ser el caso de Juan Zarco y de Alfonso Orueta –“La idea de generación: una revisión crítica”²⁷²– y o la de Domingo Comas Arnau –“El canon generacional: una aproximación topológica”²⁷³–. Trabajos que apenas han tenido trascendencia. Todo ello con la excepción del muy valioso –a la par que clarificador– trabajo teórico-metodológico de profundidad de Julio Aróstegui. Es a él, a quien le debemos hoy la aportación más importante en términos de calidad, con el añadido de que además trataría de ir de lo teórico a lo empírico al insertar la cuestión generacional en una posible *historia del tiempo vivido*. De hecho, su capítulo *Historia del presente e interacción generacional* dentro *La historia vivida*, constituye una referencia central que permanecerá vigente durante un largo tiempo²⁷⁴.

Ahora bien, con o sin marco teórico, lo que también sobresale es el más que amplio *consenso* académico-político en relación a la asociación –casi imperturbable– que se ha dado en la mayoría de las publicaciones en castellano, a la hora de asociar generación con *consenso* o

aquellos años: EISENSTADT, Shmuel N., *From to Generation to Generation. Age groups and social structure*, Illionois, The Free Press, 1966; MEAD, Margaret, *Cultura y compromiso. Estudios sobre la ruptura intergeneracional*, Buenos Aires, Granica, 1971; MICHAEL, Donald N., *La próxima generación: las perspectivas de la juventud de hoy y mañana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1974; y, FISCHER, Ernst, *Problemas de la generación joven*, Madrid, Ayuso, 1975.

²⁶⁷ GOERTZEL, Ted, “Generational conflict and social change”, *Youth and Society*, vol. III, nº 3, (1972), pp. 327-352.

²⁶⁸ MURDOCK, Graham y McCRON, Robin, “Consciousness of class and consciousness of generation” en HALL, Stuart y JEFFERSON, Tony (eds.), *Resistance through Rituals. Youth subcultures in post-war Britain*, 2ª ed., New York, Routledge, 2006 [1993], pp. 162-177.

²⁶⁹ ARNES, Sara (ed.), *The myth of generational conflict: the family and state in ageing societies*, London, Routledge, 1999. Y asimismo: WALTER, Alan (ed.), *The New Generational contract. Intergenerational relations, old age and welfare*, London, UCL Press Limited, 1996. Unos años antes: LAQUEUR, Walter y MOSSE, George (eds.), *Generations in Conflict*. Dossier monográfico, *Journal of Contemporary History*, vol. V, nº 1, (1970).

²⁷⁰ CHAUVEL, Louis, *Le Destin des...*, *op.cit.*.

²⁷¹ KESSLER, Denis y MASSON, André (eds.), *Cycles de vie et générations*, Paris, Economica, 1985; ATTIAS-DONFUT, Claudine, *Sociologie des générations. L’empreinte du temps*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991; y, id. (dir.), *Les solidarités entre générations: vieillesse, familles, État: ouvrage collectif*, Paris, Nathan, 1995.

²⁷² ZARCO, Juan y ORUETA, Alfonso, “La idea de generación: una revisión crítica”, *Sistema*, nº 144, (1998), pp. 107-115.

²⁷³ COMAS ARNAU, Domingo, “El canon generacional: una aproximación topológica”, *Sistema*, nº 178, (2004), pp. 3-39. Tiempo más tarde del mismo autor, id., “La generación premeditada y la sociedad tecnológica: el cambio social y la necesaria adaptación conceptual”, *Sistema*, nº 197-198, (2007), pp. 121-142.

²⁷⁴ De nuevo consúltese el capítulo 3 de, ARÓSTEGUI, Julio, *La historia vivida...*, *op.cit.*.

con *solidaridad*. Pero, ¿por qué? No se puede escapar, una vez más que la inexistencia de un conflicto social generalizado –de *tintes generacionales* en nuestro caso– haya contribuido sobresalientemente a este enfoque mayoritario consensualista²⁷⁵. Ello a pesar de la dramática situación por la que atravesaría la generación del *baby boom* durante los años ochenta y noventa, quien siempre ocuparía los más altos *ranking* de paro/desempleo, temporalidad/precariedad, economía sumergida... Sin embargo, se ha tendido –consciente o inconscientemente– a explicar –cuando no a *celebrar*– dicha relación no conflictiva en base a determinadas solidaridades que no terminan de explicarse del todo en sus diferentes trasfondos, y que más parecen responder a una explicación política antes que académica. La hipótesis de la *invisibilización del conflicto* también ha de insertarse aquí.

No obstante, lo que nos interesa reseñar es el interés sobrevenido de no pocos expertos – desde Álvaro Espina²⁷⁶, Julio Iglesias de Ussel²⁷⁷, Louis Roussel²⁷⁸, Luis Garrido²⁷⁹, Almudena Moreno Mínguez²⁸⁰ o el propio Carles Feixa²⁸¹ – en destacar el *feliz acontecimiento* que fuera gracias a la estructura familiar mediterránea la que sirviera de *colchón* de amortiguamiento de cara a evitar mayores conflictos sociales en nuestro tiempo de estudio. En todo caso, lo que la mayor parte de estos autores han tendido a obviar o a pasar por alto, son, al menos, dos cuestiones centrales: la primera, que a pesar de lo no existencia de un conflicto generacional –en esa dinámica, que puede darse entre *sucesión*, *cambio* y *ruptura*– la misma no puede llevar a invisibilizar los costes sociales y humanos de la modernización económico y social; y segundo, lo que tampoco suelen referirse estos estudios es a la inexistencia de mecanismos institucionales correctores de la desigualdad, lo que a su vez refleja las insuficiencias y limitaciones del precario estado del Bienestar. Significativo al respecto sería la obra de los hermanos Marí-Klose –*Edad de cambio: jóvenes en los circuitos de solidaridad intergeneracional*²⁸²–. Asimismo se ha de destacarse la *otra cara* del proceso aquí descrito de la mano de autores como Antonio Santos Ortega²⁸³, Teresa Jurado²⁸⁴ o Sergio Gálvez Biesca²⁸⁵, que han insistido en destacar las

²⁷⁵ Al respecto no pocas publicaciones del INJUVE: MARTÍN SERRANO, Manuel (dir.), *Historia del cambio...*, op.cit.; MIGUEL, Amando de (dir.), *Dos generaciones de...*, op.cit..

²⁷⁶ ESPINA, Álvaro, “El reto de la integración laboral de la generación del «Baby Boom»”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 1-2, (1988), pp. 179-192. Asimismo véase el trabajo de, LARAÑA, Enrique, “La juventud contemporánea y el conflicto intergeneracional”, *De juventud: revista de estudios e investigación*, nº 3, (1981), pp. 39-62.

²⁷⁷ IGLESIAS de USSEL, Julio, “¿Conflicto generacional o armonía familiar?: Los jóvenes en España” en LÓPEZ CASERO, Francisco, BERNECKER, Walter L. y WALDMAN, Peter (comps.), *El precio de la modernización: formas y retos del cambio de valores en la España de hoy*, Madrid, Iberoamericana, 1994, pp. 149-182.

²⁷⁸ ROUSSEL, Louis, “La solidaridad intergeneracional. Ensayo de perspectivas”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 70, (1995), pp. 11-24;

²⁷⁹ GARRIDO, Luis, “La temporalidad ¿pacto intergeneracional o imposición?” en CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ed.), *La duración del...*, op.cit.; y, id., “Paro juvenil o...”, op.cit..

²⁸⁰ MORENO MÍNGUEZ, Almudena, “El mito de la ruptura intergeneracional en los jóvenes españoles” en *Emancipación y familia*. Dossier monográfico, *Revista de estudios de juventud*, nº 58, (2000), pp. 33-43.

²⁸¹ FEIXA, Carles, “Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea”, *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, vol. IV, nº 2, (2006)

²⁸² MARÍ-KLOSE, Pau y MARÍ-KLOSE, Marga, *Edad de cambio: jóvenes en los circuitos de solidaridad intergeneracional*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2006. Véanse también: INJUVE (GRUPO TELECYL), *Relaciones intergeneracionales entre padres e hijos*, Madrid, INJUVE, 2002 [inédito]; MEGÍAS, Eusebio, *Comunicación y conflictos entre hijos y padres*, Madrid, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2003.

²⁸³ SANTOS ORTEGA, Antonio, “«Generación flexible»: vivencias de la flexibilidad de los jóvenes parados” en id. y SERRANO PASCUAL, Amparo (coords.), *Del desempleo estructural al paro*

consecuencias tanto sociales como históricas de la *precaria transición juvenil* de la “generación de la cultura de la precariedad”, así como en la reconversión de los conflictos sociales “clásicos” hacía actitudes juveniles violentas o radicales, muy lejos de la “solidaridad automática” –como defienden no pocos autores– pregonada.

Pero más allá de este breve estado de la cuestión, el estudio del hecho generacional por sí solo ya aporta dos cuestiones de relevancia: por un lado, ayuda a concretar de mejor forma el *espacio histórico* de nuestra investigación²⁸⁶; y por otro, nos abre la *posibilidad* científica de determinar un conjunto de rasgos característicos de la generación que se va a estudiar. Es decir, nos acerca a la *eventualidad* de establecer un modelo explicativo para el estudio de caso.

No obstante, el análisis del hecho generacional se encuentra sujeto a múltiples elementos e interpretaciones. Para internarnos en esta realidad, al menos, tenemos que realizar cinco pasos. Todos ellos interconectados. Primero, como han traído a colación los citados Juan Zarco y Alfonso Orueta una posible definición del término de generación podría concretarse de la siguiente forma: “un grupo de personas que siendo contemporáneas y coetáneas presentan cierta relación de coexistencia, es decir, que tienen intereses comunes, inquietudes análogas o circunstancias parecidas”²⁸⁷. A partir de aquí, cabe, pues, interrogarse sobre si la generación objeto de estudio reúne los tres elementos centrales de pertenencia al hecho generacional: a) el *ser contemporáneo*; b) el *ser coetáneo*, es decir, similares cohortes de edad en el mismo tiempo histórico objeto de acontecimientos; c) el *compartir una circunstancia*²⁸⁸.

La pertenencia y/o inclusión en una generación responde antes que nada –tal como advirtió Mannheim– a las condiciones materiales y sociales en las que estarían inmersos los individuos²⁸⁹. A saber: los mecanismos de reproducción social existentes en una sociedad dada. Esta aclaración, en parte, responde a determinados –y habituales– acercamientos desde las ciencias sociales al hecho generacional. Enfoques que han limitado su campo de estudio a la identificación de una serie de valores o de identidades, a partir de las cuales se podría definir y concretar los límites de una generación²⁹⁰. Nada más lejos de la realidad. Aunque también es cierto que la suma de valores compartidos constituye un indicador preliminar y necesario para el análisis del fenómeno citado. En todo caso, y como advirtió en su día Antonio Santos, no se

flexible. Dossier monográfico, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XXIV, nº 2, (2006), pp. 63-83.

²⁸⁴ JURADO GUERRERO, Teresa, “La precariedad temporal-salarial y sus efectos sobre la formación familiar” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la..., op.cit.*, pp. 367-404.

²⁸⁵ GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La generación de la «cultura de la precariedad»: una aproximación desde la historia del movimiento obrero” en id. (ed.), *Cultura de la..., op.cit.*.

²⁸⁶ ARÓSTEGUI, Julio, *La historia vivida..., op.cit.*, p. 110.

²⁸⁷ ZARCO, Juan y ORUETA, Alfonso, “La idea de..., *op.cit.*, p. 109. Esta propuesta puede complementarse a través de la definición aportada por Nerina Jansen procedente, a su vez, de la tradición orteguiana: «La generación es el determinado conjunto social de perspectivas desarrolladas por los coetáneos que comparten las mismas circunstancias, o la forma social en que existen las perspectivas desarrolladas por coetáneos que comparten las mismas circunstancias». JANSEN, Nerina, *La teoría de..., op.cit.*, p. 94.

²⁸⁸ ZARCO, Juan y ORUETA, Alfonso, “La idea de..., *op.cit.*, p. 109.

²⁸⁹ MANNHEIM, Karl, “El problema de..., *op.cit.*, pp. 193-244. Véase un minucioso estudio sobre la teoría de Karl Mannheim en, SÁNCHEZ de la YNCERA, Ignacio, “«La sociología ante el problema generacional»: anotaciones al trabajo de Karl Mannheim”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 62, (1993), pp. 147-192.

²⁹⁰ Ejemplo de lo aquí dicho fueron las aportaciones de, MIGUEL, Amando de (dir.), *Dos generaciones de..., op.cit.*.

puede desvincular el estudio de esta figura histórica concreta o *formación histórica singular*²⁹¹ de los procesos de dominación y explotación²⁹².

Ahora bien, no todas las experiencias históricas por las que atraviesa una misma generación adquieren un significado igual para todos los individuos que la componen. De ahí que exista la posibilidad de variaciones en la *forma de estratificación de la experiencia* y en donde el elemento de “clase social” es, sencillamente, determinante²⁹³. En todo caso, lo que requiere atención es la identificación, a partir de un contexto y una coyuntura precisa, de los procesos históricos que terminan *unificando a una generación*²⁹⁴. Lo anterior es clave para cualquier análisis histórico, pues para diferenciar y determinar el número de generaciones que conviven en un mismo espacio y tiempo, necesitamos adentrarnos en el estudio de la *interacción* –segundo paso– de sus diferentes ritmos biológicos e históricos²⁹⁵. Aspectos marcados básicamente por la *edad social y cronológica*, y las *perspectivas* –su mundo vital–: la del pasado (los viejos), la del presente (los adultos) y la del futuro (los jóvenes). De modo que,

«[l]a pertenencia a una generación, a su vez, sitúa también al individuo en una ‘posición’ o ‘situación’ social particular. Se pertenece a una generación como se está integrado en un estrato social o se vive en un momento histórico determinado, aunque no se haya generado una conciencia sobre ello»²⁹⁶.

El proceso de *interacción generacional*, por tanto, consiste en concentrar en cómo las tres generaciones presentes –al menos– en un momento histórico se suceden con el paso del tiempo. Asimilación, rechazo o creación de nuevos valores y formas de vida constituyen algunos de los posibles escenarios de este proceso de *interacción* entre generaciones. Téngase en cuenta, además, que ante todo nos enfrentamos a un proceso dinámico en donde se va a producir,

«una transmisión de cultura, pero al mismo tiempo una modificación de la misma. Y es en ese trasiego de vivencias, intercambio de experiencias e ilusiones es donde se fragua una realidad vital cohesionada que justifica la identidad cultural»²⁹⁷.

Llegados aquí aparece un problema no menor: ¿Dónde situar el principio y el fin de una generación? –he aquí el tercer paso–. De nuevo Zarco y Orueta presentan una hipótesis relevante: la existencia y vivencia de un *acontecimiento histórico singular*. Un acontecimiento que “afecta a todos los grupos generacionales [...] [aunque] el impacto que reciben es asumido notoriamente diferente por cada uno de ellos”²⁹⁸. En nuestro caso, el hecho de haber vivido en primera persona los gobiernos socialistas así como las consecuencias de sus políticas económicas y laborales.

Pero no todas las generaciones tendrán la misma importancia e impacto en el acontecer histórico. Sólo será el transcurso del tiempo, y a partir del papel jugado por cada generación, lo que determinará o no su protagonismo histórico–cuarto paso–. Suceda una cosa u otra, las relaciones entre dos generaciones activas en juego mantienen unas no fáciles relaciones entre ambas. Conexiones que pueden llegar a condicionar su posible protagonismo histórico. Tres características han de resaltarse. Primero, que las relaciones intergeneracionales se encuentren

²⁹¹ Término este último acuñado por, RICOEUR, Paul, *La memoria, la historia, el olvido*, Madrid, Trotta, 2003.

²⁹² SANTOS ORTEGA, Antonio, “Identidades formateadas: normalización del empleo inestable y participación juvenil”, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 45, (1990), p. 43.

²⁹³ MANNHEIM, Karl, “El problema de...”, *op.cit.*, p. 201.

²⁹⁴ *Ibídem.*

²⁹⁵ ARÓSTEGUI, Julio, *La historia vivida...*, *op.cit.*.

²⁹⁶ *Ibídem.*

²⁹⁷ ZARCO, Juan y ORUETA, Alfonso, “La idea de...”, *op.cit.*, p. 110.

²⁹⁸ *Ibídem*, p. 112.

sujetas “por una asimetría de poder y de autoridad”²⁹⁹. Segundo, estas relaciones antes que nada son relaciones dialécticas y por tanto sujetas a tensiones y permanentes enfrentamientos. Tercero, sí un elemento describe a las relaciones intergeneracionales es la posibilidad de que mismas finalicen en un conflicto abierto entre ambas³⁰⁰. No obstante, la posibilidad de un conflicto y/o ruptura generacional depende, en última instancia de las *formas de producción de los individuos*, a partir de una modificación previa de los mecanismos de reproducción social. Así pues, “cuando cambian las condiciones de reproducción de los grupos sociales y, por tanto, las condiciones sociales y materiales de producción de nuevos miembros, es cuando se producen diferencias de generación: los nuevos miembros son generados de manera distinta”³⁰¹.

Incluso si aislamos estos casos no tan infrecuentes de lo que cabría imaginar a primera vista, lo que nos queda por delante tampoco resulta fácil. Primero, tenemos que interrogarnos, desde esta misma perspectiva generacional, por tres elementos estrechamente interrelacionados con las formas de transmisión de los acontecimientos vividos por parte de los propios sujetos protagonistas de los hechos históricos: a) cómo esta generación se concibe a sí misma; b) cómo se ha transmitido su experiencia histórica en el presente y su conciencia sobre ello; c) y en definitiva sí su aportación al devenir de la historia contemporánea del país resultó útil o no tanto en términos personales como a nivel de pertenencia a un grupo. Es decir, no sólo cabe atender a cómo se sienten representados los sujetos sino cómo ha sido transmitida –en caso de que así sea– sus vivencias a la siguiente generación.

A su vez, esta cuestión guarda una estrecha relación con otro interrogante especialmente “delicado” en nuestra investigación: hasta qué punto la experiencia de la precariedad laboral – como una ruptura de un proyecto de vida previamente concebido– afectó al cumplimiento o no de una serie de expectativas vitales a raíz de su formación personal, familiar, laboral, cultural... De ahí, la necesidad de estudiar los procesos de socialización de esta misma “generación de la cultura de la precariedad”, junto con los valores, ideologías y relatos ofrecidos, a partir de los cuales se formaron e iniciaron la transición a la vida adulta³⁰². Tan sólo así parece posible acercarnos a la experiencia histórica de esta generación de trabajadores precarios.

2.2.8. Ciencias políticas: una bibliografía central para el estudio del socialismo y de la socialdemocracia europea a nivel comparado

Sí la historiografía ha estado próximo a otra ciencia social, esta ha sido la de las ciencias políticas. A partir de temáticas comunes o próximas han trazado en no pocas ocasiones caminos paralelos. En especial, a través de la “clásica” histórica política preocupada por las organizaciones, sus programas así como los procesos electorales. No obstante, las diferencias metodológicas pero ante todo teóricas son notables, en tanto la pretensión de la politología de aplicar más o menos cerrados marcos teóricos de construcción a cada estudio de caso, sigue constituyendo una poderosa barrera diferenciadora.

Nos detendremos aquí en tres relevantes aspectos, en donde las aportaciones provenientes de las ciencias políticas han sido determinantes en el mejor conocimiento de esta época. De hecho, se podría añadir que han generado estudios pioneros en aspectos claves, que van desde la configuración de las élites políticas, pasando por los propios procesos electorales, para detenernos, por último, en los estudios dedicados al PSOE y a la UGT, y claro está, de los gobiernos socialistas.

²⁹⁹ ARÓSTEGUI, Julio, *La historia vivida...*, *op.cit.*, p. 93.

³⁰⁰ Véase, JANSEN, Nerina, *La teoría de...*, *op.cit.*, pp. 94-97.

³⁰¹ MARTÍN CRIADO, Enrique, *Producir la juventud...*, *op.cit.*, p. 83.

³⁰² Definiciones y acercamiento sobre el concepto de ‘socialización’ en, AGULLÓ TOMÁS, Esteban, *Jóvenes, trabajo e...*, *op.cit.*; y en, MORALES NAVARRO, Julián y ABAD MÁRQUEZ, Luis Vicente, *Introducción a la sociología*, Madrid, Tecnos, 2008, véase, en concreto, el apartado “IV. El proceso de socialización”.

Con respecto a la primera cuestión citada, al menos, desde finales de la década de los ochenta hasta el presente, los estudios acerca tanto de la clase parlamentaria así como de las propias élites políticas a nivel estatal como local –véanse los trabajos de María Luz Morán³⁰³, Mariano Torcal y Pradeep Chhibber³⁰⁴, Mariano Baena³⁰⁵, Irene Delgado Sotillos³⁰⁶ o Salvador Parrado³⁰⁷, entre otros– han retratado ampliamente dichos aspectos. Para nuestra investigación ha resultado en extremo valiosa la tesis doctoral de Juan Rodríguez Teruel –*Los Ministros en la España Democrática*³⁰⁸–. Un trabajo que ha venido a ofrecer una visión general acerca de todos y cada uno de los cambios ministeriales, así como un retrato biográfico de cada uno de sus protagonistas. A ello debe sumarse el trabajo de José Ramón Urquijo –*Gobiernos y ministros españoles en la Edad Contemporánea*³⁰⁹–. Y de forma destacada la también tesis doctoral de Santiago Aparicio García –*El liderazgo político en la España contemporánea: el caso del PSOE (1974-2000)*³¹⁰– que sigue constituyendo una década después de su lectura, uno de los más valiosos relatos acerca del papel que jugaría Felipe González y Alfonso Guerra en la reconstrucción, conquista y liderazgo del socialismo español.

Lógicamente uno de los asuntos que más atención ha acaparado han sido los procesos electorales. Aquí se cuenta con una numerosa bibliografía en permanente crecimiento³¹¹. Una línea de investigación con múltiples debates cruzados, tanto sobre la participación electoral, las orientaciones políticas y en lo que cada vez concita una mayor atención: hasta qué punto el voto económico –una vez que la perspectiva “de clase” ha ido quedando también en un plano secundario– es determinante en la elección electoral final.

Perspectivas investigadoras que resultan de especial interés para el tiempo en que nos movemos. Si ya hemos destacado que uno de los grandes éxitos del socialismo en el poder sería el control y la anulación de la posibilidad de un conflicto social generalizado; otro tanto se puede decir al respecto de sus sucesivos éxitos electorales. Dos legislaturas con mayoría absoluta (1982-1986; 1986/1989), una legislatura con mayoría absoluta técnica (1989-1993) y

³⁰³ MORÁN, M^a Luz, “Un intento de análisis de la «clase parlamentaria» española: Elementos de renovación y de permanencia”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n^o 45, (1989), pp. 61-84.

³⁰⁴ TORCAL, Mariano y CHHIBBER, Pradeep, “Elites, *cleavages* y sistema de partidos en una democracia consolidada: España (1986-1992)”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n^o 69, (1995), pp. 7-38.

³⁰⁵ BAENA, Mariano, *Elites y conjuntos de poder en España (1939-1992): un estudio cuantitativo sobre el Parlamento, Gobierno y Administración y gran empresa*, Madrid, Tecnos, 1999.

³⁰⁶ DELGADO SOTILLOS, Irene, “Elites políticas y vida parlamentaria: actividades y motivaciones de los diputados españoles” en MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Antonia (ed.), *El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimiento*, Madrid, Tecnos, 2000, pp. 295-342.

³⁰⁷ PARRADO, Salvador, *Las élites de la administración estatal (1982-1991): estudio general y pautas de reclutamiento*, Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 1996.

³⁰⁸ RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en la España Democrática. Perfil, trayectorias y carrera ministerial de los miembros de gobierno de Suárez a Zapatero (1976-2005)*, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2006.

³⁰⁹ URQUIJO, José Ramón de, *Gobiernos y ministros españoles en la Edad Contemporánea*, 2^a ed., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008.

³¹⁰ APARICIO GARCÍA, Santiago, *El liderazgo político en la España contemporánea: el caso del PSOE (1974-2000)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2002. Más recientemente: RICO, Guillem, *Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electoral en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009. Y más concretamente, JIMÉNEZ DÍAZ, José Francisco, “El liderazgo político de Felipe González en su contexto”, *Sociedad y Utopía*, n^o 33, (2009), pp. 287-312.

³¹¹ Un estado de la cuestión a principios de los años noventa en, MONTERO, José Ramón y PALLARÉS, Francesc, *Los estudios electorales en España: un balance bibliográfico (1977-1991)*, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1992.

otra legislatura con mayoría parlamentaria relativa (1993-1996). Un encadenamiento de resultados electorales que no tienen parangón en nuestra historia contemporánea. Todo ello a pesar tanto de los costes y conflictos que acarreó la modernización socialista, los casos de corrupción, los errores políticos y electorales de bulto –ejemplo de ello sería la doble campaña electoral que el PSOE realizaría en 1993, a partir de dos equipos de técnicos enfrentados y comandados por José María Maravall y Alfonso Guerra, respectivamente³¹²– así como el creciente malestar social –tras el temprano entierro del “espíritu del 82”³¹³– que alcanzaría altas cuotas durante los noventa; y pese a todo lo anterior perdería por una pequeña diferencia las elecciones generales de 1996.

Los trabajos –en su mayor parte publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas– de Ignacio Sánchez-Cuenca y Belén Barreiro –*Los efectos de la acción del gobierno en el voto durante la época socialista*³¹⁴– de Ignacio Lago Peñas a partir de su tesis doctoral –*El voto estratégico en las elecciones generales en España*³¹⁵– pero especialmente los de Marta Fraile –*Cuando la economía entra en las urnas*³¹⁶– y de nuevo de Javier García de Polavieja –*¿Qué el voto de clase?*³¹⁷– han venido proporcionando suficientes evidencias empíricas sobre la realidad electoral española. En concreto, las relacionadas con la hipótesis del “voto económico” cada vez cobran mayor atención y notoriedad, aunque, por otro lado, es de destacar la falta de consensos al respecto. A los anteriores, han de sumarse las recientes aportaciones de Juan Jesús González y Fermín Bouza –*Las razones del voto democrático en España*³¹⁸– y otra serie de trabajos que siguen rastreando en las razones que impulsan el voto en

³¹² MORILLAS, Juan Rafael, “Objetivos de los votantes, accountability de los políticos: El comportamiento electoral de los votantes cambiantes al PSOE en las elecciones generales de 1993 y la accountability del incumbent”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 156, (2000). Y asimismo: FERNÁNDEZ MELLIZO-SOTO, M^a., “¿Para qué sirven las campañas electorales? Los efectos de la campaña electoral española de 1993”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 148, (2000).

³¹³ Muy significativo al respecto resultaría las apreciaciones de la obra de quien fuera en su momento Secretario de Estado de Comercio, entre otros cargos, durante los ejecutivos socialistas: VELASCO, Luis, *Políticas del PSOE, 1982-1995: del ‘cambio’ a la decepción*, Barcelona, Icaria, 1996.

³¹⁴ SÁNCHEZ-CUENCA RODRÍGUEZ, Ignacio y BARREIRO, Belén, *Los efectos de la acción de gobierno en el voto durante la etapa socialista (1982-1996)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000.

³¹⁵ LAGO PEÑAS, Ignacio, *El voto estratégico en las elecciones generales en España (1977-2000): efectos y mecanismos casuales en la explicación del comportamiento electoral*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2005 [tesis doctoral del Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 2003]

³¹⁶ FRAILE, Marta, *Cuando la economía entra en las urnas: el voto económico en España (1979-2006)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2005.

³¹⁷ GARCÍA DE POLAVIEJA, Javier, “¿Qué es el voto de clase? Los mecanismos del voto de clase en España”, *Zona Abierta*, nº 96-97, (2001), pp. 173-213; y id., “El paro te cambia: los mecanismos causales de voto de castigo en las elecciones generales de 1996”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 180, (2002). En esta misma línea, MANCHA NAVARRO, Tomás, *Economía y votos en España: una aproximación al estudio de la interdependencia político-económica en España*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1993. Y también: CALLE ROBLES, Luis de la, “Carretas y votos: el PSOE y las políticas territoriales de construcción de coaliciones de apoyo (1982-1996)”, *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, vol. IV, nº 1, (2005), pp. 65-96.

³¹⁸ GONZÁLEZ, Juan Jesús y BOUZA, Fermín, *Las razones del voto democrático en España, 1977-2008*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009. Bajo otra óptica: CASTRO, Carles, *Relato electoral de España (1977-2007): las claves de la alternancia en el poder durante tres décadas de monarquía parlamentaria*, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2008.; y, OÑATE, Pablo (ed.), *Treinta años de elecciones en España*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010. Así como también una de las obras

España. Sin embargo, los estudios dedicados monográficamente al estudio del voto juvenil, desde la transición a la democracia, han sido hasta el momento escasos y con claras limitaciones no tanto metodológicas sino estadísticas³¹⁹.

A las anteriores perspectivas generales –teniendo presente no pocos libros colectivos como los coordinados por Juan José Linz y José Ramón Montero³²⁰, Irene Delgado Sotillos y Lourdes López³²¹, Pilar del Castillo³²² o los de Joaquim Molins y Pablo Oñate³²³– asimismo se cuenta con una considerable bibliografía acerca de las que pueden considerarse como una de las elecciones claves de nuestra contemporaneidad: las que tuvieron lugar el 28 de octubre de 1982. Unas fechas en donde el análisis sociológico electoral tan sólo comenzaba a andar a nivel académico. No obstante, en torno aquel *momento fundacional* de la época socialista, junto con los primeros análisis aparecidos en diferentes números de la *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* –tanto el número 20 (1982)³²⁴ como más extensamente en forma de monográfico en el número 28 (1984)³²⁵– se han de resaltar los estudios patrocinados por la Fundación Friedrich Ebert³²⁶ o el de Alejandro Muñoz Alonso³²⁷.

Ahora bien, han sido las aportaciones sobre la historia del socialismo, tanto a nivel de partido como a nivel gubernamental, las que más han contribuido a nuestra investigación. De entrada, los estudios precursores de Richard Gillespie –*Historia del Partido Socialista Obrero*

claves de este periodo: JUSTEL, Manuel, *La abstención electoral en España, 1977-1993*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1995.

³¹⁹ Entre los escasos estudios al respecto pueden citarse los siguientes: ANDUIZA PEREA, Eva, *Actitudes, valores y comportamientos políticos de los jóvenes españoles*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2001; MATEOS, Araceli y MORAL, Félix, *El comportamiento electoral de los jóvenes españoles en las elecciones generales*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2001

³²⁰ LINZ, Juan José y MONTERO, José Ramón (eds.), *Crisis y cambio: Electores y partidos en la España de los años ochenta*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986. Y dentro de esta obra colectiva, véase el capítulo, PUHLE, Hans-Jürgen, “El PSOE: un partido predominante y heterogéneo” (pp. 291-344).

³²¹ DELGADO SOTILLOS, Irene y LÓPEZ NIETO, Lourdes, *Comportamientos políticos, partidos grupos de presión: sociología electoral*, Madrid, UNED, 1993.

³²² CASTILLO, Pilar del (ed.), *Comportamiento político y electoral*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995. Véase aquí también: HERAS, Raúl, *Enciclopedia política y atlas electoral de la democracia española*, Madrid, Temas de Hoy, 1997.

³²³ MOLINS, Joaquim y OÑATE, Pablo (eds.), *Elecciones y comportamiento electoral en la España multinivel*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006.

³²⁴ LOPEZ PINTOR, Rafael y JUSTEL, Manuel, “Iniciando el análisis de las elecciones generales de octubre de 1982”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 20, (1982), pp. 155-168.

³²⁵ Véase el nº 28, (1984) de *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* con un dossier monográfico dedicado a las elecciones de 1982, con artículos del interés como los siguientes: SANTAMARÍA OSSORIO, Julián, “Elecciones generales de 1982 y consolidación de la democracia” (pp. 7-18); WERT, José Ignacio, “La campaña electoral de 1982: el camino del cambio” (pp. 63-84); o, CACIAGLI, Mario, “España 1982: las elecciones del cambio” (pp. 85-118).

³²⁶ EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA [NAVARRO BOTELLA, Francisco José], *Las elecciones generales de 1982: opiniones y actitudes políticas de los españoles*, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, [1983].

³²⁷ MUÑOZ ALONSO, Alejandro, *Las elecciones del cambio*, Barcelona, Argos Vergara, 1984. Desde otras perspectivas más generalistas: BONACHELA MESAS, Manuel [et al.], *El comportamiento electoral a l'Estat Espanyol (1977-1982)*, Barcelona, Fundación Jaume Bofill / La Magrana, 1984; BUSE, Michael, *La nueva democracia española: sistema de partidos y orientación del voto (1976-1984)*, Madrid, Unión Editorial, 1984; y, LANCASTER, Thomas y LEWIS-BECK, Michael S., “The Spanish voter: tradition, economics, ideology”, *Journal of Politics*, nº 48, (1986), pp. 648-674.

Español (1989/1991)³²⁸ – y años más tarde el de Sebastián Royo –*From social democracy to neoliberalism* (2000)³²⁹– vinieron a despojar de ciertas aureolas románticas y mitificas que pesaban sobremanera hasta entonces en torno a la historia política del socialismo español. Pero no sólo, pues, ambos introdujeron más que una *perspectiva disidente* una *perspectiva crítica*, que venía a “desnudar” la historia del socialismo español. Si en el caso de la obra de Richard Gillespie –convertida en una referencia central no discutible– una vez prontamente traducida por Alianza al castellano, se dejaba sobrada constancia de las *miserias políticas*, pero ante todo del pragmatismo de los líderes socialistas en su elaboración de la estrategia conducente a la conquista del poder político; la obra de Sebastián Royo –rara vez citada y menos consultada– relataba –de forma precisa y clara– la transformación ya no sólo política sino programática del socialismo en el poder, a través de un Gobierno que llevaría a la práctica políticas de carácter liberal o como indica el propio autor *neoliberal*. A su vez unos años antes Donald Share en *Dilemmas os Social Democracy* (1989) –obra al igual que la anterior no traducida al castellano, a pesar de su calidad– se interna –a diferencia de la Richard Gillespie– por los primeros pasos del ejecutivo socialista, apuntando lo que tiempo más tarde se iba a convertir en una de las claves analíticas: los dilemas o *trade-off* –antes que las contradicciones propias del socialismo español previas a la conquista del poder político– a los que tendrían que hacer los propios socialistas en la puesta de su proyecto económico y político³³⁰.

Pero ha sido a través de un pequeño conjunto de tesis doctorales –de muy desigual calidad, ciertamente– donde se localiza el mayor “granero” de contribuciones sobre el socialismo español contemporáneo en castellano. Un significativo dato que nos vuelve a hablar también de la falta de una agenda investigadora propia a la par que especializada en torno a los ejecutivos socialistas. Leídas –y públicas las más de las veces– en su mayor parte entre finales de los noventa y los primeros años de la primera década del siglo XXI proceden de diferentes universidades. Tras el estudio en 1986 de Paloma Román –*El Partido Socialista Obrero Español en la transición española: organización e ideología*³³¹– vendría la tesis doctoral de Javier Astudillo –*Los recursos del socialismo: las cambiantes relaciones entre el PSOE y la UGT*³³²–. Dirigida por José María Maravall, a día de hoy constituye el más amplio como documentado estudio comparativo sobre las relaciones entre el PSOE y la UGT. A partir de una amplia documentación –en su mayor parte conocida y de fácil acceso– acompañada de importantes testimonios orales y de un marco teórico –debatible como discutible– Astudillo reconstruye y recorre las no siempre fáciles relaciones dentro de la familia socialista así como la posterior ruptura traumática. A las anteriores referencias han de sumarse también las tesis doctorales de Mónica Méndez Lago –*La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero*

³²⁸ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*. Del mismo autor: id. y PATERSON, William E. (eds.), *Rethinking social democracy in Western Europe*, London, Frank Cass, 1993.

³²⁹ ROYO, Sebastián, *From social democracy...*, *op.cit.*.

³³⁰ SHARE, Donald, *Dilemmas of Social Democracy: The Spanish Socialist Workers Party in the 1980s*, London, Greenwood Press, 1989

³³¹ ROMÁN, Paloma, *El Partido Socialista Obrero Español en la transición española: organización e ideología (1975-1982)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1986. Y años más tarde: id., “El PSOE: un partido en trayectoria circular (1977-1999)” en MONEDERO, Juan Carlos y PANIAGUA, Juan Luis (eds.), *En torno a la democracia en España: temas abiertos del sistema político español*, Madrid, Tecnos, 1999, pp. 255-272.

³³² ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del socialismo: las cambiantes relaciones entre el PSOE y la UGT (1982-1993)*, Tesis Doctoral, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 1998; id., “Without Unions, but Socialist: The Spanish Socialist Party and its divorce from its unions confederation”, *Politics & Society*, vol. XXIX, nº 2, (2001), pp. 271-294; id., “La trampa partidista de la UGT: de la relación solidaria con el PSOE a la unidad de acción sindical con CCOO”, *Revista Española de Ciencia Política*, nº 11, (2004), pp. 73-101.

Español³³³– y de María Silvestre Cabrera –*La legitimación socialdemócrata del Estado del Bienestar*³³⁴– que recorrieron cuestiones centrales de la historia del socialismo español.

En cualquier caso, sí en un campo la ciencia política –tanto nacional como internacional– ha sido prolífica, este es en el estudio de las grandes e importantes transformaciones de la socialdemocracia europea durante la década de los ochenta. Aspecto central para interpretar adecuadamente lo que a su vez va a suceder en el caso del socialismo español. Permanente punto de discusión y de debate, desde muy temprano recorría los diferentes *trade-off* así como las líneas de actuación a las que se enfrentaron los propios partidos socialistas en Europa. No es casual, que publicación de la mayor parte de las obras de referencia, se sitúe a lo largo de los años noventa, tras las experiencias socialistas de la década anterior y la posterior caída del Muro de Berlín. Todo ello en plena consolidación del proyecto neoliberal. Verdadero periodo de crisis del “gran” proyecto socialdemócrata que arranca de la segunda mitad del siglo XX, y que ve consumado su declive programático en aquellas mismas fechas.

Han sido, en su inmensa mayoría, los politólogos e intelectuales socialdemócratas quienes más han participado de estos debates. A lo que de añadirse otra especificidad: el contraste entre las escasas obras en castellano y la prolífica bibliografía anglosajona. De esta forma, si exceptuamos la traducción de las obras de Adam Przeworski –*Capitalismo y socialdemocracia*³³⁵– de Fritz W. Scharpf –*Socialdemocracia y crisis económica en Europa*³³⁶– y Wolfgang Merkel –*¿Final de la socialdemocracia?*³³⁷– junto con el trabajo de principios de los noventa de Joan Pico –*Los límites de la socialdemocracia europea*³³⁸– y más recientemente de Ludolfo Paramio –*La socialdemocracia*³³⁹– y de José Sevilla Segura –*El declive de la socialdemocracia*³⁴⁰– la producción principal en castellano termina ahí.

Centrados en su mayor parte en la Europa occidental, habría que destacar, en primer lugar, el trabajo clave de Gøsta Esping-Andersen –*Politics against markets*³⁴¹– del año 1985, así como las obras dirigidas por William Paterson y Alastair Thomas –*The future of social democracy*³⁴²– o por Herbet Kitschelt –*The transformation of European social democracy*³⁴³–

³³³ MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (1975-1996)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2000.

³³⁴ SILVESTRE CABRERA, M^a, *La legitimación socialdemócrata del Estado del Bienestar: PSOE (1979-1990)*, Tesis Doctoral, Universidad de Deusto, 2000.

³³⁵ PRZEWORSKI, Adam, *Capitalismo y socialdemocracia*, Madrid, Alianza, 1988.

³³⁶ SCHARPF, Fritz W., *Crisis and Choice in European Social Democracy*, Ithaca, Cornell University Press, 1991 [*Socialdemocracia y crisis económica en Europa*, València, Alfons el Magnàmin, 1991].

³³⁷ MERKEL, Wolfgang, *¿Final de la socialdemocracia? Recursos de poder y política de gobierno de los partidos socialdemócratas en Europa occidental*, València, Edicions Alfons el Magnàmin, 1995.

³³⁸ PICO, Joan, *Los límites de la socialdemocracia europea*, Madrid, Siglo XXI, 1992.

³³⁹ PARAMIO, Ludolfo, *La socialdemocracia*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009.

³⁴⁰ SEVILLA SEGURA, José V., *El declive de la socialdemocracia*, Barcelona, RBA, 2011.

³⁴¹ ESPING-ANDERSEN, Gøsta, *Politics against markets: the social democratic road to power*, Princeton / New Jersey, Princeton University Press, 1985. Véase también: GOUREVITCH, Peter A., *Politics in hard times: comparative responses to international economic crisis*, Ithaca, Cornell University Press, 1986.

³⁴² PATERSON, William E. y THOMAS, Alastair J. (eds.), *The future of social democracy: problems and prospects of social democratic parties in Western Europe*, Oxford, Clarendon Press, 1986.

³⁴³ KITSCHULT, Herbet, *The transformation of European social democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

respectivamente. A sumarse lo anterior, estarían otras que van a venir a incorporar tiempo más tarde de forma tardía la especificidad del caso español: por ejemplo el libro dirigido por Paul Heywood –*Politics and policy in democratic in Spain*³⁴⁴– o el de Andrew Glyn –*Social Democracy in neoliberal times*³⁴⁵–. De cualquier de las formas, aquí habría que destacar los propios trabajos de José Maravall de los primeros años noventa en *Socialist parties in Europe*³⁴⁶.

Ya en una línea más distante con respecto a los resultados de las políticas socialdemócratas se situaría la obra colectiva de Tom Gallagher y Alan Williams –*Southern European socialist*³⁴⁷–; y desde un enfoque marxista el desconocido como valioso volumen colectivo de James Kurth y James Petras, *Mediterranean Paradoxes*³⁴⁸.

Por último, han de reseñarse un conjunto de trabajos de enorme valor al establecer un marco comparativo a nivel internacional entre el caso español y el británico –nos referimos a la obra central de Carles Boix, *Partidos políticos, crecimiento e igualdad*³⁴⁹ (de la que se hablara largo y tendido) y de Laura Cruz Castro, *Gobiernos, mercado de trabajo y formación profesional*³⁵⁰– y del caso del socialismo español y francés –W. Rand Smith, *The left's dirty job*³⁵¹–. Estudios que no suelen abundar y que tantas enseñanzas aportan.

2.2.9. Las obras periodísticas: una gran base de datos por explorar

Más allá de las habituales reticencias de los historiadores, sí un gremio ha publicado decenas de libros sobre la época socialista, éste ha sido el de los periodistas con alguna que otra colaboración aislada de historiadores. Sin riesgo a equivocarnos estamos ante el mayor corpus bibliográfico de cara a nuestra investigación.

Ahora bien, los problemas de acercarnos al mismo no son sólo del tipo “académico”. Van mucho más allá. Tres, al menos, han de resaltarse: el primero, la preeminencia de

³⁴⁴ HEYWOOD, Paul (ed.), *Politics and policy in democratic Spain. No longer different?* London, Frank Cass Publishers, 1999. Y dentro del mismo: CHARI, Raj J., “Spanish Socialists, Privatizing the Right Way?” (pp. 162-179).

³⁴⁵ GLYN, Andrew (ed.), *Social Democracy in neoliberal times: the left and economic policy since 1980*, Oxford, Oxford University Press, 2001. A destacarse dentro de ese mismo volumen, RECIO, Albert y ROCA JUSMET, Jordi, “The Spanish Socialists in power: thirteen years of economic policy” (pp. 173-199).

³⁴⁶ MARAVALL, José M^a [et al.], *Socialist parties in Europe*, II vols., Barcelona, Institut d'Edicions de la Diputació, 1991, vol. I. En concreto, id., “From opposition to government: the politics and policies of the PSOE” (pp. 5-34); MERKEL, Wolfgang [et al.], *Socialist parties in Europe: of class, populars, catch-all?* Barcelona, Institut d'Edicions de la Diputació, 1991, vol. II.

³⁴⁷ GALLAGHER, Tom y WILLIAMS, Alan M. (eds.), *Southern European socialist. Parties, elections and the challenge of government*, Manchester, Manchester University Press, 1989. Dentro de esta obra colectiva: WILLIAMS, Allan M., “Socialist economic policies: never off the drawing board?” (pp. 188-216).

³⁴⁸ KURTH, James y PETRAS, James (eds.), *Mediterranean Paradoxes...*, op.cit.. Véase aquí el trabajo ya citado del propio Petras –“Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism”–. Y también, id., *La socialdemocracia del Sur de Europa*, Madrid, Revolución, 1984.

³⁴⁹ BOIX, Carles, *Partidos políticos, crecimiento...*, op.cit.; id., “Building a socialdemocratic strategy in Southern Europe: Economic Policy under the González Government (1982-93)”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 69, (1995).

³⁵⁰ CRUZ CASTRO, Laura, *Gobiernos, mercado de trabajo y formación profesional: un análisis comparativo de España y Gran Bretaña*, Tesis Doctoral, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 2000.

³⁵¹ SMITH, W. Rand, *The left's dirty job: the politics of industrial restructuring in France and Spain*, Toronto, University of Toronto Press, 1998.

visiones dicotómicas sobre este tiempo histórico. Lejos de la búsqueda de *distancia* con el objeto de análisis –antes que de una pretendida *objetividad* fundada en criterios científicos– propia tanto del trabajo académico como estrictamente historiográfico; en su mayor parte la bibliografía disponible –casi sin excepciones– abordan los diferentes aspectos de los gobiernos socialistas, no ya desde un sesgo personal, sino claramente político. Con una nota añadida –a modo de una segunda posible característica– un claro y amplio predominio de las visiones conservadoras y derechistas, vinculadas a determinados grupos de presión entre ellos el *Opus Dei*. Y tercer término, otro obstáculo notable, es el presentismo con el que están escritas la mayoría de las obras a las que, en breve nos referiremos. Frutos de encargos editoriales o movidas por otros criterios menos confesables, el citado *periodismo de investigación* brilla por su ausencia con las lógicas excepciones.

Pese a lo anterior, y más allá de la presumible *calidad* de los libros publicados, este tipo de literatura no es sólo importante sino esencial para abordar los objetivos de nuestra tesis doctoral. Primero, por la infinidad de datos, documentación, testimonios y pistas claves que se ofrecen en los mismos. Segundo, por la riqueza y pluralidad de temas que se abordan, hasta prácticamente no haber dejado ninguna cuestión de relieve sin examinar. Y tercero, ya que vienen a reflejar, el “estado de ánimo” de la época en donde se redactaron. Esto último, no puede minusvalorarse, pues nos proporcionan otros tantos caminos de aproximación para comprender no pocas acciones y decisiones gubernamentales, que no suelen revelar otro tipo de documentación en “frio”. A todo ello se suma otra realidad lógica: convertidos no pocos libros de periodistas en auténticos *best-sellers*, los mismos, a su vez, crearían, en no pocos casos, determinados “estados de opinión”, especialmente en las materias más sensibles y delicadas de la acción del gobierno. La capacidad de alternar, modificar e influir del llamado “cuarto poder” en la propia realidad política, económica y social de un país es, simplemente, evidente. En dicha labor, contribuirían con notable interés editoriales como Temas de Hoy –la más prolífica de todas– Planeta, Plaza & Janés, Cambio 16 o Espasa-Calpe. Todo ello con la colaboración de los más conocidos y destacados periodistas en España.

La previsible llegada al poder de los socialistas en el contexto de lo que se denominó con acierto el “espíritu del 82”³⁵², generaría una enorme expectación, al mismo tiempo, que viejas incertidumbres volvían a la primera escena, no tanto por el programa socialista ya depurado de cualquier “radicalismo”, sino por la pervivencia de una “memoria colectiva histórica” viva vinculada al reciente el pasado traumático del país. Precisamente esta “memoria colectiva” tan importante de cara a alentar o re-direccionar el voto a la par que crear un estado social de opinión, sería instrumentalizada desde muy pronto por parte de la derecha política con poderosos anclajes políticos con el régimen franquista ante el exponencial crecimiento electoral socialista. Estamos ante las conocidas “campanas del miedo”. Un ejemplo –entre otros muchos posibles– sería la obra de Pilar Cambra –autora cercana al *Opus Dei*– que titulada *Socialismo no es libertad* y que bajo el inquietante subtítulo, *El verdadero programa del PSOE* y acompañado todo lo anterior de un fotomontaje en la portada con el rostro del propio Marx y el “puño y la rosa”; en el preciso contexto de las elecciones de 1979 avisaría de posibles los riesgos y males para la “Patria” de la llegada de los socialistas al poder³⁵³. No puede descartarse la influencia –parcial, en cualquier caso– de este tipo obras, así como los propios resultados de las dos primeras citas electorales democráticas, en la propia metamorfosis socialista tras el XXXVIII Congreso de 1979. Lo cierto es tras aquellas “frustrante” experiencia, la definición marxista del Partido no sólo se había convertido en un lastre político, sino también electoral, según aventuraron y defendieron la dirección política del PSOE.

³⁵² Al respecto: ALCOVER IBÁÑEZ, Norberto, *España, 1982-1995: de la fascinación al quebranto*, Madrid, PPC, 1995.

³⁵³ CAMBRA, Pilar, *Socialismo no es libertad. El verdadero programa del PSOE*, Madrid, Dossant, 1979.

Según se iba aproximaba la fecha histórica del 28 de octubre, una ingente avalancha de publicaciones saldrían a la luz en torno a las incertidumbres que todavía seguía generando el socialismo español, pero que ante todo se van a interrogar por lo que se conocería como la futura “herencia recibida” o directamente por la capacidad del PSOE en dar respuestas a los múltiples retos que tenía por delante. Desde la obra de Manuel Campo Vidal –*La España que hereda Felipe González*³⁵⁴– hasta la de Carlos Alonso de los Ríos y Carlos Elordi –*El desafío socialista*³⁵⁵– toda una serie de libros van a venir a dar cuenta de las extendidas preocupaciones sociales y políticas. Preocupaciones, por cierto, con una amplia demanda editorial ante el seguro triunfo electoral socialista. De hecho, el último libro citado constituye una de las referencias claves. En él, Alonso de los Ríos como Elordi “destriparían” la conversión tanto política e ideológica como organizativa del PSOE en su progresiva profesionalización, como en otros pocos estudios de corte académico. Ejemplo, de periodismo de investigación aportarían una infinidad de datos y documentación, que profundizarían en la nueva “faz” del socialismo español:

«En ocho años la dirección socialista ha conseguido montar sobre el cañamazo obsoleto del viejo partido un instrumento cuyo objetivo ha sido la toma del poder político para modernizar, hacer eficaz y honesta la maquinaria del Estado. En torno a este propósito moderado y radical al tiempo, la dirección del PSOE ha cribado a los hombres aptos para esta política. ¿Socialdemócratas? Justamente aptos para los objetivos de la dirección»³⁵⁶.

En cualquier caso, sería tras el triunfo electoral y a partir del 29 de octubre de 1982 cuando se produce un *boom editorial* sobre los gobiernos socialistas, que no cesaría hasta su salida del poder casi catorce años después, siendo especialmente intenso durante el primer lustro de los noventa. De hecho, se hace necesario establecer una serie de categorías dentro de estas obras periodísticas. Junto con los trabajos periodísticos que se citarán en otros apartados de este mismo estado de la cuestión –en su mayor parte biografías de dirigentes socialistas así como libros de testimonios– una posible división –a pesar de los riesgos que implica– estaría basada en cuestiones temáticas antes que políticas u de otro tipo.

En un primer bloque, habría que situar aquellas obras “generalistas”. A saber, libros que observarían la época socialista a nivel global. Junto con el ya citado libro de “Cándido” –*La sangre de la rosa*³⁵⁷– que constituye un fiel como cercano retrato de las interioridades del socialismo durante toda su gestión; asimismo habría que citarse obras como las de José Oneto –*¿A dónde va Felipe?*³⁵⁸– o la de Gloria Lomana –*El ciclón socialista*³⁵⁹–. Ejemplos de concisos relatos de los primeros años socialistas, con documentación inédita en no pocos casos y datos que posteriormente han pasado desapercibidos. No obstante, dentro de este primer apartado, deben destacarse las monografías y obra colectivas de Javier Tusell y Justino Sinova –*El secuestro de la democracia, La crisis de la democracia y La década socialista*³⁶⁰– que a partir de un claro sesgo político, en todo caso, abordan una serie de balances globales sobre dicho tiempo histórico.

³⁵⁴ CAMPO VIDAL, M., *La España que hereda Felipe González*, Barcelona, Argos Vergara, 1982.

³⁵⁵ RÍOS, César Alonso y ELORDI, Carlos, *El desafío socialista*. Barcelona, Laia, 1982.

³⁵⁶ *Ibíd.*, p. 7. Asimismo véase, CARABANTES, Antonio, *Balance y futuro del socialismo*, Barcelona, Planeta, 1984.

³⁵⁷ CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de..., op.cit.*.

³⁵⁸ ONETO, José, *¿A dónde va Felipe?: cambio año I*, Barcelona, Argos Vergara, 1984.

³⁵⁹ LOMANA, Gloria, *El ciclón socialista: 1982-1986, primera legislatura socialista*, Barcelona, Plaza & Janés, 1987.

³⁶⁰ SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *El secuestro de la democracia. Cómo regenerar el sistema político español*, Barcelona, Plaza & Janés / Cambio 16, 1990; TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista: el ocaso de Felipe González*, Madrid, Espasa-Calpe, 1992; SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *La crisis de la democracia en España. Ideas para reinventar*

En un segundo bloque –ya más prolífico– deberían situarse todo un conjunto de obras que en un momento u otro indagaron en las relaciones entre Gobierno y las estructuras del poder económico, pero también en los múltiples casos de corrupción que van a limar la imagen político-social y electoral del PSOE. He aquí cuando realmente, aunque no en todos los casos, se podría hablar de “periodismo de investigación”. La mayoría de ellos tendría una favorable recepción editorial. Son todavía hoy especialmente relevantes los trabajos de investigación como los de Enrique Díaz González sobre Rumasa³⁶¹ o los de José Díaz Herrera y Ramón Tijeras³⁶². Estos últimos con *El dinero del poder* –libro que alcanzaría varias reediciones– a principios de los años noventa –coincidente en el tiempo con el lento declive socialista– describirían una realidad todavía no perceptible –y creíble, por extensión– para buena parte de la sociedad: las intensas como fluidas relaciones entre el PSOE y la clase dominante, así como los negocios y los niveles de vida de los propios Ministros y demás altos cargos, empezando por el mismo Carlos Solchaga. En esta misma línea, se han de situar los trabajos de Mariano Guindal –acompañado en la mayor parte de las ocasiones de Mar Díaz-Varela– en donde se iba un paso más allá al establecer los vínculos entre el Gobierno-Partido y la CEOE. Ahora bien, ha sido su reciente obra –*El declive de los dioses*– en donde ha retratado –desde su posición privilegiada como periodista económico en estas últimas décadas– el que quizás sea uno de los retratos más contundentes de las estrategias de coaptación de poder de la clase empresarial, las sumisiones políticas así como las miserias de las principales organizaciones políticas y sindicales del país³⁶³.

Cuando en 1990 Mario Sánchez Soler publicaba *El libro negro de la corrupción política en España* –justo un año antes de la publicación de *El dinero del poder*– el mismo vendría a abrir la “veda” para toda una literatura de éxito en torno a las extendidas redes de corrupción socialista, cuyas principales tramas se conocerían en los siguientes años³⁶⁴. Libros como los de Manuel Hermógenes –*El agujero: PSV y los dineros de UGT*³⁶⁵– o el de Fernando González Urbaneja –*Banca y poder*³⁶⁶– sumados a los de Andrés Torres –*La financiación irregular del PSOE*³⁶⁷– complementarían esta saga de obras. A ellas habría que sumarse las decenas de libros sobre el terrorismo de Estado vía los Gal, como la publicada por Melchor Miralles –*GAL: la historia que sacudió el país*³⁶⁸–.

El felipismo además de cómo “corriente personalista-política” interna del PSOE, se convertiría en todo un fenómeno mediático-social. Las “mejoras plumas” de la derecha política ofrecerían sus múltiples caras, en lo que, en cierta parte, se terminó por convertir en una de sus *obsesiones-compulsivas*. Más allá de los escasos libros de carácter progresista –

nuestro sistema político, Madrid, Espasa-Calpe, 1997. Véase aquí también: ESTEBAN, Jorge de, *El Estado de la Constitución: diez años de gobierno del PSOE*, Madrid, Libertarias / Produfi, 1992.

³⁶¹ DÍAZ GONZÁLEZ, Enrique, *Rumasa*, Barcelona, Planeta, 1983.

³⁶² DÍAZ HERRERA, José y TIJERAS, Ramón, *El dinero del...*, *op.cit.*.

³⁶³ DÍAZ-VARELA, Mar y GUINDAL, Mariano, *A la sombra del poder. CEOE el partido de los patronos: desde la transición económica, y el posterior manejo del PP, hasta el desengaño con el PSOE*, Barcelona, Tibidabo, 1990; GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*.

³⁶⁴ SÁNCHEZ SOLER, Mariano, *El libro negro de la corrupción política en España*, Madrid, Tiempo, 1990.

³⁶⁵ HERMÓGENES, Manuel, *El agujero: PSV y los dineros de UGT*, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

³⁶⁶ GONZÁLEZ URBANEJA, Fernando, *Banca y poder: la pasión por ser banquero*, Madrid, Espasa-Calpe, 1993. Y asimismo, RIVASÉS, Jesús, *Mariano Rubio. Los secretos del Banco de España*, Madrid, Temas de Hoy, 1991.

³⁶⁷ TORRES, Andrés, *La financiación irregular del PSOE*, Barcelona, Ediciones la Tempestad, 1993. Y unos años antes, SARASQUETA, Antxon, *El abuso del Estado*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

³⁶⁸ MIRALLES, Melchor, *GAL: la historia que sacudió el país*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2006.

Ismael Fuentes³⁶⁹ o Javier Ortiz³⁷⁰ –predominarían las posiciones más militantes de la derecha –José María Carrascal³⁷¹, Federico Jiménez Losantos³⁷², Pedro J. Ramírez³⁷³, José María Zavala³⁷⁴ o Pilar Cernuda³⁷⁵– y en mucha menor medida las “moderadas” (no exentas de cierto radicalismo) –Fernando Jáuregui³⁷⁶ o Casimiro García-Abadillo³⁷⁷–. Conjunto de libros que ayudarían a sobredimensionar la realidad política del felipismo.

Bajo estas preocupaciones y claves analíticas el historiador se puede aproximar a esta literatura. No resulta fácil, pues los riesgos de caer en lo intrascendente en lo anecdótico o en lo banal están más que presentes. Tampoco resulta sencillo verificar en no pocos casos la procedencia de las fuentes de información. Y pese a lo anterior, estamos ante el mayor “granero” (y de más fácil acceso) de información sobre los gobiernos socialistas.

2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: la historia oficial/militante y los «soportes intelectuales» del socialismo español

La pretensión de abordar una historia del socialismo contemporáneo exige detenerse antes de dar paso a los propios estudios académicos, en el amplio conjunto de publicaciones oficiales/institucionales, partidistas y a medio camino entre lo político y lo académico, del entorno de las instituciones y fundaciones culturales y de pensamiento del propio PSOE. Estamos de aquí, de hecho, ante una prolífica bibliografía sobre la que rara vez se han detenido los investigadores, y en donde todavía ha sido menos frecuente balances ya no sólo cuantitativos sino cualitativos.

Desde libros a modo de historia oficial –o si se prefiere estrictamente militante– pasando por publicaciones partidistas –abundantes hasta finales de la década de los setenta– o las aportaciones de los que calificáremos como los “soportes intelectuales” del socialismo, hasta las propias memorias de los dirigentes del socialismo español, nos hallamos ante una literatura que nos ayuda a adentrarnos por tres cuestiones claves: primero, la evolución de la “cultura política” del PSOE; segundo, en la configuración de la (auto)percepción subjetiva del papel histórico que desde el mismo PSOE se concibe frente al país; y en tercer lugar, nos permite

³⁶⁹ FUENTE, Ismael, *El caballo cansado: el largo adiós de Felipe González*, Madrid, Temas de Hoy, 1991.

³⁷⁰ ORTIZ, Javier, *El felipismo de la A a la Z*, Madrid, Espasa-Calpe, 1996.

³⁷¹ CARRASCAL, José M^a, *La agonía del felipismo*, Madrid, Espasa-Calpe, 1996.

³⁷² JIMÉNEZ LOSANTOS, Federico, *Contra el felipismo: crónicas de una década*, Madrid, Temas de Hoy, 1993; id., *La dictadura silenciosa: mecanismos totalitarios en nuestra democracia*, 3^a ed., Madrid, Temas de Hoy, 1993.

³⁷³ RAMIREZ, Pedro J., *David contra Goliath: jaque mate al felipismo*, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

³⁷⁴ ZAVALA, José M^a, *Las mentiras de González*, Barcelona, Plaza & Janés, 1996.

³⁷⁵ CERNUDA, Pilar, *Crónicas de la crispación: una visión personal del fin del felipismo*, Madrid, Temas de Hoy, 1996. En torno a la elaboración y diseño de la conocida “estrategia de la crispación” véase el ilustrativo trabajo de, MARAVALL, José M^a, “Las estrategias de crispación bajo Felipe González y Zapatero”, *Claves de Razón Práctica*, nº 184, (2008), pp. 8-21.

³⁷⁶ JÁUREGUI, Fernando, *La metamorfosis. Los últimos años de Felipe González: de la crisis de Suresnes a la crisis del XXXII Congreso*, Madrid, Temas de Hoy, 1993. E igualmente, ROA, Vicente, *Apoteosis y ocaso del felipismo*, [Madrid], CDN, 1993.

³⁷⁷ GARCÍA-ABADILLO, Casimiro, *El balance: luces y sombras de la España del PSOE*, Madrid, Temas de Hoy, 1997; id., *De la euforia al descrédito: crónica del dinero*, Madrid, Espasa-Calpe, 1995.

observar desde una posición privilegiada las llamadas “contradicciones del socialismo” en su estrategia de conquista del poder político³⁷⁸.

Pocos han sido los historiadores –repetimos– que se hayan adentrado en este posible estado de la cuestión, lo que vuelve a denotar la falta de interés ya no sólo por la época socialista, sino en la propia familia socialista durante el último tercio del siglo XX. Es relevante –antes de avanzar con detenimiento– que a excepción del trabajo de Francisco Luis Martín –*De estrella rutilante a secundario ilustre*³⁷⁹– y del que nosotros publicáramos en el año 2006 en *Historia del Presente –Del socialismo a la modernización*³⁸⁰– no se conocen a día de hoy –aun a riesgo de equivocarnos– trabajos en esta línea.

El propio Francisco Luis Martín fue claro en torno a la extendida percepción que existe al respecto:

«Cuando uno, sin afán nostálgico y sin compartir, desde luego, el tópico de cualquier tiempo pasado fue mejor [...] no puede por menos de reconocer que, al menos desde un punto de vista cuantitativo y de la relación oferta-demanda, se ha producido una clara evolución –en este caso cabría mejor hablar de involución– en el tratamiento historiográfico del socialismo en España que iría desde una especie de eclosión en los años ochenta, precedida de un “crescendo” que recorre la década anterior, hasta el reflujo –para otros, crisis– actual»³⁸¹.

Un “vacío” de estudios historiográficos que sigue constituyendo un importante obstáculo para acercarse a esta época y a este sujeto histórico. Lo que se pretende aquí, es ofrecer un panorama general incidiendo, por lo demás, en aquellas cuestiones más notorias de cara a los objetivos de nuestra investigación. Además, claro está, de destacar la importancia de dicha literatura poco atendida desde la academia.

Desde mediados de los años ochenta –aunque su labor comenzaría unos años antes– la Fundación Pablo Iglesias –la que mayor trayectoria acapara de todo el conglomerado de fundaciones del entorno socialista– iría publicando numerosos catálogos de cara a dar a conocer al investigador la documentación existente para el estudio del PSOE, de las Juventudes Sociales y de la propia UGT³⁸². En este sentido, su labor no sólo es encomiable sino prácticamente única por su magnitud dentro del mundo de los archivos relacionados por los partidos de la izquierda

³⁷⁸ GÁLVEZ BIESCA, Sergio y MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “Las contradicciones del socialismo: una aproximación a la historia política del PSOE en la Transición (1972-1986)” en *La transición a la democracia en España: actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos: Guadalajara, 4-7 de noviembre 2003*, II vols., Guadalajara, Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial, 2004, vol. II [CD-ROM].

³⁷⁹ LUIS MARTÍN, Francisco de, “«De estrella rutilante a secundario ilustre» o de la historiografía reciente sobre el socialismo en España” en FORCADELL, Carlos (ed.), *A los 125 años de la fundación del PSOE. Las primeras políticas y organizaciones socialistas*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 54, (2004), pp. 255-287.

³⁸⁰ GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Del socialismo a la modernización: los fundamentos de la «misión histórica» del PSOE en la transición”, *Historia del Presente*, nº 8, (2006), pp. 199-218; y también, id., “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*.

³⁸¹ LUIS MARTÍN, Francisco de, “«De estrella rutilante a secundario ilustre» o de la historiografía reciente sobre el socialismo en España” en FORCADELL, Carlos (ed.), *A los 125...*, *op.cit.*, p. 255.

³⁸² FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS, *Cien años de socialismo en España: bibliografía*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1979; id., *Catálogo de publicaciones periódicas*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1984; MARTÍN NÁJERA, Aurelio, *Guía para la consulta del fondo documental de la Fundación Pablo Iglesias: archivo, biblioteca y hemeroteca*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1989; id. (dir.), *Catálogo de los archivos de Guerra Civil de las comisiones ejecutivas del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1988; y GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio, *Fuentes para la historia de la Unión General de Trabajadores*, Madrid, Pablo Iglesias, 1988; MARTÍN NÁJERA, Aurelio, *Fuentes para la historia del Partido Socialista Obrero Español y de las Juventud Socialistas de España*, II vols., Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1991 [con presentación de Felipe González y prólogo de Enrique Moral Sandoval].

política y por extensión del movimiento obrero –a excepción como veremos del caso relativo a la Fundación 1º de Mayo–. No sólo, pues asimismo ha impulsado recientemente obras tan necesarias como un *Diccionario biográfico del socialismo español*³⁸³ o un grueso libro –*Partido Socialista Obrero Español*³⁸⁴– que supone una amplia recopilación informativa de los principales datos organizativos, políticos, cronológicos de todo tipo. En este sentido, se hace también necesario resaltar el papel jugado por el director del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Aurelio Martín Najera –acompañado en ocasiones por Antonio González Quintana– a la hora de dar a conocer la información que guarda su valioso archivo.

Sin embargo, y como examinaremos en el siguiente subapartado, estos numerosos catálogos tienen una importante limitación: la cronológica. Lo que a su vez ha de conectarse con la propia realidad documental del citado archivo, pues, la mayor parte de los *papeles* llegan a lo sumo al año 1976-1977. Todo ello en el mejor de los casos³⁸⁵.

Lo dicho con anterioridad no ha sido obstáculo alguno para que desde este mismo entorno político-cultural se hayan promovido con evidente entusiasmo una *particular* como *singular* “historia oficial y/o militante”, que abarca tanto la transición como los siguientes años. Tiene por lo común este tipo de relatos no pocas características similares. En primer lugar, la publicación de las mismas en relación a fechas y efemérides claves en la historia del socialismo español. En segundo término, las mismas han evolucionado con el paso del tiempo, tratando de combinar la estricta “versión oficialista” del socialismo con algún que otro rasgo de encargo académico, bajo el afán de dotar a las mismas de cierta consistencia teórica y metodológica³⁸⁶. En cualquier caso, desde la perspectiva del historiador, cabría preguntarse por lo siguiente: ¿por qué la persistencia de seguir promocionando historias oficiales/militantes, tras todas las críticas que desde el mundo académico se realizaron a las mismas durante los primeros pasos que acompañarían a la crisis historiográfica del movimiento obrero? ¿Sigue teniendo sentido hoy día tales obras en medio de una consolidada academia profesionalizada? Entonces, ¿cuáles son las causas de seguir impulsando en este tipo de narraciones hagiográficas? ¿Se puede seguir manteniendo política e institucionalmente un solo relato, una sola “verdad”?

Sobresale este pertinaz empeño (con no pocas dosis de voluntarismo militante) especialmente cuando se revisan los trabajos impulsados por las fundaciones de otras organizaciones políticas y sindicales históricas de la izquierda española. Fundaciones, que no sólo pusieron punto y final a este tipo de historias desde los primeros años ochenta, sino que además trataron desde entonces de promocionar su memoria e historia, a base de trabajos historiográficos fundados en las mínimas reglas del conocimiento histórico y sometidos a las críticas pertinentes. El caso de la historiografía del PCE quizás pueda resultar el más significativo de todos, especialmente cuando se revisan aquellos intentos de historia oficial de los años sesenta y setenta, que impregnarían a varias generaciones de militantes comunistas³⁸⁷.

³⁸³ Id. (dir.), *Diccionario biográfico del socialismo español (1879-1939)*, II vols., Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2010.

³⁸⁴ Id. *Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2009.

³⁸⁵ Sobre esta misma cuestión volveremos en el apartado, “2.3.1. Anomalías, obstáculos jurídicos y demás voluntades políticas”.

³⁸⁶ MORAL SANDOVAL, Enrique (dir.) [Comité del Centenario del Partido Socialista Obrero Español], *Cien años por el Socialismo. Historia del PSOE (1879-1979)*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1979. Un caso aparte lo constituiría, GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio, MARTÍN NÁJERA, Aurelio y GÓMEZ BRAVO, Gutmaro, *100 años Juventudes Socialistas protagonistas del cambio*, Madrid, Fundación Tomás Meabe, 2006.

³⁸⁷ Nos referimos a, IBÁRRURI, Dolores [et al.], *Historia del Partido Comunista de España (versión abreviada)*, París, Editions Sociales, 1960; o, IBÁRRURI, Dolores [et al.], *Guerra y Revolución en España, 1936-1939*, III vols., Moscú, Ediciones Progreso, 1966-1977. Desde la Fundación de Investigaciones Marxistas tras la salida de la dictadura rápidamente se pondría punto y final a este tipo de

Por no extendernos más de lo necesario, habría que destacar la obra coordinada por José Félix Tezanos –*PSOE 125*³⁸⁸– como uno de los últimos ejemplos de este tipo de literatura, tras las publicaciones de finales de los setenta. Publicado en el año 2004 cuando se cumplían el 125 aniversario de la fundación del PSOE, aquel volumen colectivo editado por la Fundación Pablo Iglesias, venía a recoger todos los lugares comunes y tópicos de esta misma historia oficial/militante, con un objetivo claro y evidente: glosar la historia del PSOE. A la falta de aparato teórico o metodológico, la ausencia de visiones no ya críticas sino distantes, lo que allí se venía a ofrecer, en resumen, era una historia edulcorada en extremo que nos presentaba –sin contradicciones ni problemas– un gran como único relato de la historia del socialismo español. A poco que se indague y se conozca parcialmente dicha trayectoria, aquella *amable narración* sintetizaba esta historia bajo tres claves interpretativas ortodoxas: a) el PSOE como el actor fundamental –prácticamente el único– de la propia historia política de la nación en una relación de hechos y acontecimientos, en donde el conjunto del socialismo se habría terminado por constituir en el garante de todos y cada uno de los avances políticos y sociales desde su fundación hasta el mismo presente; b) junto con el persistente anticomunismo y otros tópicos de la mitología del socialismo español, se presentaban allí las bases fundacionales de la “misión histórica” del PSOE con respecto a la necesidad de modernizar a España en cada una de sus etapas históricas. De hecho se nos dibuja un PSOE descargado de ideología política y que al parecer resultaba que desde Pablo Iglesias no habría tenido otro afán que modernizar y volver a modernizar la nación; c) y avanzando el tiempo junto con la canonización del propio Iglesias, se canonizaba también la figura política del propio Felipe González en un relato lineal, acrítico y exento de cualquier tipo de mínima crítica. A modo de ejemplo puede leerse:

«[U]n cúmulo de circunstancias políticas, económicas y sociales hizo caer sobre los hombros de los socialistas españoles la tarea de conjugar en las responsabilidades de gobierno el desarrollo de una política propiamente socialista con una respuesta eficaz al reto de vertebrar a la sociedad española y de conducirla, sin crear tensiones irresponsables y sin sobresaltos, hacia las coordenadas de un país industrializado y moderno [...]. En consecuencia la modernización se convirtió en uno de los principales elementos de referencia de la gestión socialista, como paso previo de un proyecto de cambio más profundo a largo plazo; era el primer peldaño de ulteriores políticas de progreso»³⁸⁹.

En fin, una historia militante a la vieja usanza, por más que en aquella ocasión los relatores del mismo fueran catedráticos de sociología o de historia. No es de extrañar, por tanto, que rara vez las mismas se citan en los propios trabajos de los profesionales de la historia. En cualquier caso, y como insistíamos líneas más arriba, este tipo de publicaciones en formato encargo tienen una gran utilidad: nos ayuda a comprender los universos de las culturas políticas vivas del socialismo español.

No termina aquí este tipo de publicaciones. Además de la también historia oficial –a modo de enciclopedia– que escribiría el propio José Félix Tezanos a principios de los

historia militante. Véase, TRIAS VEJARANO, Juan (coord.), *Contribuciones a la historia del PCE*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004 [1980]. Un exhaustivo balance en, BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Por una historia social del comunismo. Notas de aproximación” en id. y id. (eds.), *«Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social*, Sevilla, Fundación de Investigaciones Marxistas / Atrapasueños, 2009, pp. 7-37.

³⁸⁸ TEZANOS, José Félix (coord.), *PSOE 125: 125 años del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2004. A destacar las visiones de, MATEOS, Abdón, “El PSOE durante la dictadura franquista” (pp. 92-125); TEZANOS, José Félix, “El PSOE entra en la democracia” (pp. 126-159). Asimismo se encargaría un relato periodístico de aquella efeméride que correría a cargo en aquella ocasión de, CARVAJAL, Pedro y MARTÍN, Julio, *Memoria Socialista: 125 años*, Madrid, Temas de Hoy, 2005.

³⁸⁹ TEZANOS, José Félix, “El PSOE entra en democracia” en id. (coord.), *PSOE 125..., op.cit.*, p. 144. Una descripción que se complementaba de la siguiente forma: «[Su proyecto] era la de un partido que aspiraba a asentar y estabilizar la democracia en España, llevando a la práctica políticas de modernización y reformas sociales equiparable a las que realizaban los partidos socialdemócratas europeos». *Ibidem*.

noventa³⁹⁰; se ha de destacar el conjunto de obras escritas por los hermanos Martínez Cobo – Carlos y José–³⁹¹. Avaladas por el propio Felipe González, de nuevo, nos encontramos con una literatura a medio camino entre la militancia y la investigación³⁹². Si por algo deben de destacarse estos mismos libros, no son por las aportaciones teóricas o las hipótesis y tesis que manejan lejos, sino por la voluntad política de presentar a las mismas como las principales obras de referencia del socialismo, desde una perspectiva casi-científica. No obstante, sería a través de los cuatro volúmenes que componen esta historia del PSOE, que abarca desde el final de la Guerra Civil hasta la transición, en donde se localizarían importantes referencias documentales.

La literatura de partido o “militante” constituyó en su momento una herramienta esencial, tanto para la formación de los militantes como para el proselitismo político. En nuestro caso concreto, este tipo de obras serían especialmente abundantes tras el fallecimiento de Franco y en pleno proceso de transición, al calor de una creciente demanda social y política. A ello se sumarían proyectos editoriales como “Cuadernos para el Diálogo” o “La Goya Ciencia”, que vendrían a responder a tales demandas.

El socialismo español así como su entorno más próximo se convertirían en prolíficos publicistas de su “causa”. Una literatura que nos permite acercarnos a las tres características centrales que antes destacábamos. Podemos distinguir tres grandes etapas en relación a sus propios objetivos políticos. Aunque los riesgos de esta nueva división son evidentes, creemos que la misma puede ayudar a comprender, además, de la evolución político-ideológica, la propia cultura organizativa del socialismo español en su conjunto.

Una primera etapa habría que situarla con el periodo de la reorganización organizativa y política del PSOE. A saber, entre los años 1976 a 1979. Es característico de este tipo de obras, el intento de explicar de forma pedagógica qué era y qué pensaba los dirigentes socialistas. La promoción de la “memoria histórica” socialista constituye uno de sus fines más visibles, de cara a recuperar y afianzar una legitimidad política perdida en las décadas anteriores. Aunque de forma poco elaborada a nivel ideológico, destacan además de por su “pobreza teórica” por el tono radical –marxista o no– que impregnan sus explicaciones y razonamientos en torno al programa socialista de entonces. De hecho, muchas de las mismas estuvieron (presumiblemente) *escritas* por los líderes del PSOE como Felipe González y Alfonso Guerra³⁹³, y otras cabezas visibles como Enrique Barón³⁹⁴, Francisco Bustelo³⁹⁵, Gregorio Peces-Barba, Carlos de Vicente y Virgilio Zapatero³⁹⁶.

³⁹⁰ Id., *Historia ilustrada del socialismo español*, Madrid, Sistema, 1993. Asimismo habría de destacarse el trabajo de fondo y de tipo académico que Manuel Tuñón de Lara y José Luis Martín Ramos llevarían a cabo en su ambiciosa historia del socialismo español, publicada a finales de los noventa: TUÑÓN DE LARA, Manuel (dir.) y MARTÍN RAMOS, José Luis (coord.), *Historia del socialismo español*, V, vols., Barcelona, Conjunto Editorial, 1989.

³⁹¹ MARTÍNEZ COBO, Carlos y MARTÍNEZ COBO, José, *La primera renovación*, vol. I. (1989); *¿República? ¿Monarquía? En busca del consenso (1946-1954)*, vol. II, (1991); *La travesía del desierto (1954-1970)*, vol. III (1995), *La segunda renovación*, vol. IV (1991). Todas ellas publicadas en Barcelona por Plaza & Janés. Igualmente, id. y id. (coord. / recop.), *Congresos del PSOE en el exilio*, II vols., Madrid, Pablo Iglesias, 1981.

³⁹² «El trabajo que se presenta a los lectores es un esfuerzo riguroso para dar a conocer los entresijos y las claves del proceso interno vivido por los socialistas en las últimas décadas. Es riguroso, porque consigue, junto a la aportación de datos no conocidos, y menos aún sintetizados hasta ahora, mantener un equilibrio entre la vivencia interna de los acontecimientos y la distancia necesaria para evitar cualquier tentación hagiográfica. Se nota que *sienten* los avatares de una organización a la que pertenecen, sin perder por ello una actitud autocrítica». GONZÁLEZ, Felipe, “Prologo” en MARTÍNEZ COBO, Carlos y MARTÍNEZ COBO, José, *La segunda renovación...*, *op.cit.*, p. 9.

³⁹³ GONZÁLEZ, Felipe, *¿Qué es el socialismo?* Barcelona, La Goya Ciencia, 1976; id. [et al.] *Socialismo es Libertad. Escuela de Verano del PSOE 1976*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976; id. y GUERRA, Alfonso, *El Partido Socialista Obrero Español*, Bilbao, Albia, 1977.

Una segunda etapa se puede llevar desde la celebración del traumático XXXVIII Congreso del PSOE hasta el triunfo electoral de octubre de 1982. Aquí ya se reduce el impulso editorial de los socialistas. Ahora bien, por más que las obras que se publican en este tiempo a nivel cuantitativo sea menor su impacto, a nivel cualitativo tienen no poca importancia. Así esta literatura de “partido” es esencial para acercarnos por los contornos no visibles de los debates acaecidos en aquel año, pero también a las interpretaciones que se van generando sobre el papel que debe jugar el *nuevo partido*, que saldría de los dos congresos celebrados en el mil novecientos setenta y nueve. De nuevo, destacan –tal y como han reconocido no pocos socialistas años después³⁹⁷– el escaso nivel ideológico de sus aportaciones teóricas. Así obras como las de Alfonso Palomares³⁹⁸, Francisco Bustelo³⁹⁹ o Pablo Castellano⁴⁰⁰ –junto con las propias publicaciones en las revistas de pensamiento del socialismo (*Sistema*, *Zona Abierta*⁴⁰¹...)– van a venir a reflejar los principales disensos en el seno del socialismo sobre la función que el Partido tenía y debía jugar, y que iba mucho más allá de las imágenes comunes transmitidas sobre la definición o no del PSOE como partido marxista. Superado el trance, clarificado el trayecto de la estrategia de la conquista del poder político, este tipo de publicaciones prácticamente desaparecían en los siguientes años, a excepción de aquellas obras –con tono *pedagógico* pero a su vez *militante*– como la editada por Alfonso Guerra –*Este viejo y nuevo partido*⁴⁰²– en donde se detallaba las líneas fundamentales de la “misión histórica” del nuevo socialismo. En cualquier caso, para entonces aquella demanda cultural de los primeros años de la transición, había ido recudiéndose una vez iniciada la estabilización política como electoral. De esta forma, lo político ya se jugaba en las instituciones, en la prensa diaria antes que en las publicaciones partidistas.

“El PSOE se convirtió prácticamente en un sello de caucho para la política del Gobierno”, señaló en su día Richard Gillespie con no pocas dosis de ironía⁴⁰³. No erraba, pues el Partido se transformaría en una mera y simple correa de transmisión de la gestión del Gobierno –a excepción de lo que sucedería durante los meses previos al referéndum de la OTAN– lo que le llevaría a un progresivo distanciamiento con su base social y electoral. Unos tiempos políticos coincidentes con una tercera etapa de publicaciones partidistas, que se

³⁹⁴ BARÓN, Enrique, *Federación de Partidos Socialistas*, Barcelona, Avance, 1976.

³⁹⁵ BUSTELO, Francisco, *El Partido Socialista Obrero Español*, Barcelona, Avance, 1976

³⁹⁶ BUSTELO, Francisco, PECES BARBA, Gregorio, VICENTE, Carlos de y ZAPATERO, Virgilio, *El PSOE*, Madrid, Avance, 1977. A sumarse a otros relevantes ejemplos: PSOE. EQUIPO JAIME VERA, *La alternativa socialista del PSOE (algunas contribuciones)*, Madrid, Cuadernos para el Dialogo, 1977; CROISSIER, Luis Carlos [et al.], *Economía y socialismo*, Madrid, Mañana Editorial, 1978.

³⁹⁷ El propio Bustelo señalaría en sus memorias: «Es una gran verdad que nuestras reflexiones teóricas eran muy poco profundas, hecho éste que siempre ha caracterizado al socialismo español en sus cien años de existencia. Tierno y Gómez Llorente, sin duda las dos mejores cabezas entre nosotros, nunca hicieron, al menos por escrito, grandes teorizaciones. Pablo Castellano, otro dirigente crítico, carece de formación teórica y yo soy por razón de oficio un historiador de la economía sin la menor capacitación filosófica», BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta. Memorias de un político frustrado*, Barcelona, Planeta, 1996, p. 123.

³⁹⁸ PALOMARES, Alfonso S., *El Socialismo y la polémica marxista*, Barcelona, Bruguera, 1979.

³⁹⁹ BUSTELO, Francisco, *Introducción al socialismo marxista*, Madrid, Dédalo, 1979.

⁴⁰⁰ CASTELLANO, Pablo, *Sobre el Partido Obrero*, Barcelona, El Viejo Topo, 1979.

⁴⁰¹ Véanse los números 20, 22 y 29 de *Zona Abierta* así los números 29-30 y 32 de *Sistema*, todos ellos publicados en 1979.

⁴⁰² GUERRA, A. (ed.), *Este viejo y nuevo partido [De Congreso a Congreso]*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1979.

⁴⁰³ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, p. 431.

puede situar entre 1982 a 1996, es decir, durante toda la época socialista. Lejos ya del tono militante y pedagógico –aunque ciertos resabios siempre presentes– las numerosas publicaciones de estos años –especialmente durante la primera legislatura (1982-1986)– se caracterizarían, precisamente, por ser una mera justificación de la política gubernamental de cara a la sociedad⁴⁰⁴. En este sentido, se ha de destacar la publicación de la obra colectiva, *La década del cambio*⁴⁰⁵. Publica en 1992 en plena efervescencia conmemorativa, los editores de la obra –Alfonso Guerra y José Félix Tezanos– configurarían las bases centrales del nuevo relato de la historia de los gobiernos socialistas, con todas las similitudes y características que se han explicado en líneas anteriores. Un libro colectivo, que certificaría los logros y méritos de la gestión de los socialistas al frente del ejecutivo de la nación, y que cuya lectura nos aboca a repensar en aquella frase dicha en su momento por Felipe González cuando afirmaba: “También se puede morir de éxito”⁴⁰⁶.

Nos aparece, pues, un PSOE sin discurso propio, sin programa pero ante todo carente de iniciativas propias, con una doble excepción. Nos referimos a la puesta en marcha de la Comisión del Programa 2000⁴⁰⁷ y en menor medida de los encuentros socialistas de Jávea⁴⁰⁸. De la mano de Alfonso Guerra –y de su entorno más próximo nucleado en torno a la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Sistema– no sólo se llevaría a cabo el último intento de “revisión socialdemócrata” del socialismo español, sino que se convertiría, a la postre, en el último *gran* debate político-teórico del PSOE antes de finalizar el siglo. Un debate teórico que llevaría a la publicación de sendos volúmenes, y cuyas propuestas y directrices serían, pese a ser aprobadas en el 32º Congreso celebrado en noviembre de 1990, a ser omitidas en la práctica. .

⁴⁰⁴ Sin ánimo ni posibilidad de exhaustividad: PSOE, *Hacia el cambio...100 días en el Gobierno*, Madrid, PSOE, 1983; PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *Un año para la esperanza: 365 días de gobierno socialista*, Madrid, PSOE, 1983; PSOE, *Libro del militante*, Madrid, PSOE, 1983; PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *España, compromiso de solidaridad: resoluciones socialistas para los años 80*, Madrid, PSOE / Equipo de Documentación Política, 1985; PSOE-CEF-Secretaría de Participación Ciudadana, *Un proyecto de futuro para la juventud. Conferencia socialista: Madrid, 12, 13, 14 diciembre 1985*, Madrid, PSOE / Secretaría de Participación Ciudadana, 1985; PSOE, *Cuatro años cumplidos. España, a punto 1982/1986*, Madrid, PSOE, 1986; PSOE-CEF, Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, *La política económica de los socialistas. Balance de un ajuste solidario*, Madrid, PSOE, 1986; o, PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *1982/1986, balance de gestión*, Madrid, PSOE / Equipo de Documentación Política, 1986.

⁴⁰⁵ GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*. En aquel volumen colectivo han de destacarse los artículos claves de: TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta”; DORADO, Roberto, “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” (pp. 57-83); o, FERNÁNDEZ MARUGAN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” (pp. 135-194).

⁴⁰⁶ Noticia, “Felipe González, “«También se puede morir de éxito»”, *El País*, 10 de noviembre de 1990.

⁴⁰⁷ COMISIÓN PROGRAMA 2000, *La economía española a debate*, Madrid, Siglo XXI, 1988; id., *Aspectos y problemas de la vida política española*, Madrid, Siglo XXI, 1988; id., *Evolución y crisis de la ideología de izquierdas*, Madrid, Siglo XXI, 1988; y, id., *La sociedad española en transformación: escenarios para el año 2000*. Años más tarde, GUERRA, Alfonso CABALLERO, Abel y TEZANOS, José Félix (eds.), *La socialdemocracia ante la economía de los años noventa*, Madrid, Sistema, 1994. Sobre su desarrollo y contenido nos remitimos a, “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

⁴⁰⁸ GUERRA, Alfonso [et al.], *Nuevos horizontes teóricos para el socialismo: Jávea II* [2º Encuentro sobre el futuro del socialismo, 22, 23 y 24 de septiembre de 1986], Madrid, Sistema, 1987. Véase aquí: TEZANOS, José Félix, “Los «encuentros de Jávea» y el futuro del socialismo español”, *Sistema*, nº 75, (1986), pp. 3-16.

Está pendiente a día de hoy el realizar una historia intelectual del socialismo en España. Si exceptuamos la excepcional obra de Antonio García Santesmases –*Repensar la izquierda*– quien se preocupó de examinar las aportaciones de los intelectuales socialistas allá a principios de los noventa, no se ha vuelto a indagar por tales cuestiones⁴⁰⁹. Ha sido común destacar la ausencia de grandes voces intelectuales dentro o en los entornos más próximos del socialismo. No creemos que esto sea así cuando se revisa detenidamente esta misma historia intelectual. Otra cuestión radicalmente diferente sería que la mayor parte de los intelectuales socialistas antes que contribuir a debates políticos o ideológicos, versarían sobre cuestiones más profanas como las estrategias políticas y electorales. En ello mucho tendría que ver la propia evolución ideológica del socialismo. Si se separa convenientemente las soflamas y los discursos políticos de los escasos debates teóricos –a excepción de lo que sucedería en el XXXVIII Congreso del PSOE, que tampoco darían para mucho en este terreno– lo que sí se puede afirmar es que si bien el PSOE careció de referentes intelectuales de primera línea, no sería así de grandes estrategias políticas, una vez que el pragmatismo político anularía las escasas y aisladas controversias ideológicas. Una realidad que también sabría captar Santos Juliá en una sus obras cumbres: *Los socialistas en la política española*⁴¹⁰.

Nos proponemos en las siguientes líneas ofrecer –sin ánimo ni posibilidad de exhaustividad, una vez más– un retrato de los principales estrategas e intelectuales del socialismo contemporáneo, pero también de aquellos otros tantos que conformarían en su momento el entramado político-intelectual-académico del PSOE. De nuevo, aquí resulta complicado, en no pocas ocasiones, diferenciar entre lo académico y lo político. A ello se suma, la inexistencia de escuelas o de grupos definidos más allá de determinados rasgos generacionales –la mayoría nacería durante la década de los años cuarenta y se implicarían en la organización socialista avanzada la década de los setenta– de las propias preferencias políticas en torno a los dos grandes vectores del PSOE personificadas en sus dos máximos representantes –el *felipismo* y el *guerrismo*⁴¹¹– así como en lo referente a la corriente interna *Izquierda Socialista*. De la misma forma, la mayor parte de los aquí citados en un momento u otro en diferentes etapas pasarían no sólo por el CEF del PSOE sino por su Comisión Ejecutiva, ocupando cargos como la Secretaria de Formación o la Secretaria de Cultura. Por último destacar, la “no presencia” de aportaciones femeninas en este ámbito.

La figura que, a buen seguro, más hizo por el socialismo en su conversión ideológica para descargarla, precisamente, de su “sobrecarga ideológica” –de la que hablara en su momento, Joaquín Almunia⁴¹²– y ofrecer antes que un programa una estrategia, a partir de la lectura del papel histórico-político a jugar por el *nuevo* socialismo, sería José María Maravall (Madrid, 1942). Doctor en sociología en la Universidad de Oxford, a la par que también doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, desarrollaría una labor fundamental en el lavado de imagen que el PSOE llevaría a cabo tras la derrota electoral de marzo de 1979. Hombre siempre próximo a Felipe González, ocuparía diferentes cargos en la Comisión Ejecutiva del PSOE –entre ellas la Secretaria de Formación– así como sería diputado en las

⁴⁰⁹ GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Repensar la izquierda. Evolución ideológica del socialismo en la España actual*, Barcelona / Iztapalapa (México), Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana, 1993.

⁴¹⁰ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Madrid, Taurus, 1996.

⁴¹¹ Una de las más aclaratorias definiciones del felipismo la podemos encontrar de nuevo en *La sangre la rosa*: «En el 88, Felipe González ya no era socialista. Fue entonces cuando nació el felipismo. ¿Qué ha sido el felipismo o qué podrá seguir siendo? El felipismo es la no ideología elevada a categoría ideológica en sí a partir de un principio tan halagador como el de la independencia intelectual. El felipismo, es por tanto, la sustancial revolución del liberalismo capitalista...». CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, op.cit., p. 126.

⁴¹² Consúltese, ALMUNIA, Joaquín, “Entrevista” en BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el socialismo*, Barcelona, Plaza & Janés, 1996, pp. 321-322.

elecciones 1986. En todo caso, su principal responsabilidad política sería estar al frente del Ministerio de Educación y Ciencia de 1982 a 1988.

Va a ser Maravall quien diseña la estrategia pero también los contenidos programáticos del nuevo socialismo que sale del XXVIII Congreso del PSOE. A pesar de que no suelen ser citados con frecuencia sus artículos, “Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical”⁴¹³ y la “La alternativa socialista. La política y el apoyo electoral”⁴¹⁴, publicados en *Zona Abierta* y *Sistema* en 1979 y 1980, respectivamente; en los mismos se desgrana lo que vendría a ser el teórico programa socialdemócrata del PSOE⁴¹⁵. A través de ambos textos –entre otros que se podrían también citar– se procede a ajustar, o más bien a reajustar, los excesos verbales de tipo ideológico previos para conferir al socialismo de un ideario totalmente ajeno a su propia tradición. Diez años después en el también artículo, “Democracia y socialdemocracia. Quince años de política en España”, publicado en *Sistema* proporcionaría una de las defensas más elaboradas acerca del carácter social de las políticas socialistas, desde el conocimiento académico antes que político⁴¹⁶.

En cualquier caso, de cara a esta investigación su monografía *El control de los políticos*, se convertiría en una de las obras que más han ayudado a comprender las dimensiones e interioridades de la acción de los ejecutivos socialistas⁴¹⁷. Un libro con notable resonancia editorial y de crítica⁴¹⁸, y a medio camino entre la investigación del funcionamiento teórico interno de los partidos –la siempre “celebrada” democracia interna– y su aplicación en relación a la experiencia socialista. Allí Maravall no sólo plantea hipótesis y tesis de enorme importancia para comprender decisiones claves de los partidos políticos a la hora de trazar sus estrategias de conquista o de conservación del poder político; sino que al mismo tiempo, y a partir de su archivo personal, da a conocer documentación hasta aquel momento inédita, y de una importancia proporcionada por cualquier memoria política publicada hasta la fecha. Aunque el

⁴¹³ MARAVALL, José M^a, “Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical”, *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 89-97.

⁴¹⁴ Id., “La alternativa socialista. La política y el apoyo electoral del PSOE”, *Sistema*, nº 35, (1980), pp. 3-48. Véase aquí también una de sus monografías centrales: id., *La política de la transición*, Madrid, Taurus, 1982.

⁴¹⁵ Interesa aquí detenerse, aunque sea de forma breve, en el retrato que llevaría a cabo muchos años después Pablo Castellano al respecto de la labor de Maravall: «A don José María Maravall le tocó el triste papel de dirigir el desarme ideológico, elemento para cualquier predigitación. Y al Sr. Guerra el situar a los notables recién adquiridos. Puede que fuere a Maravall, aunque lo enunciara González, al que se le ocurriera esa brillante idea de convertir al marxismo en un simple método de análisis». CASTELLANO, Pablo, *Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias*, Madrid, Temas de Hoy, 1994, p. 320.

⁴¹⁶ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia. Quince años de política en España”, *Sistema*, nº 100, (1991), pp. 41-67. Y también años más tarde, id., *La confrontación política*, Madrid, Taurus, 2008. También léase una interesante entrevista del mismo en: “José María Maravall. Una peligrosa manera de pensar” en IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada..., op.cit.*, pp. 33-92. Por último no deje de consultarse el volumen en *homenaje* a su figura y trayectoria académica con interesantes y notables aportaciones SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio y PRZEWORSKI, Adam, *Democracia y socialdemocracia. Homenaje a José María Maravall*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012.

⁴¹⁷ MARAVALL, José M^a, *El control de los políticos*, Madrid, Taurus, 2003.

⁴¹⁸ El ya fallecido Javier Pradera escribiría al respecto: «La fructífera convergencia entre teoría y práctica visible en la escritura de *El control de los políticos* descansa a la vez sobre un amplísimo conocimiento bibliográfico de la historia de diversos países democráticos y sobre las propias experiencias del autor; algunas citas extraídas de su correspondencia político-personal inédita con Felipe González proyecta una nueva luz sobre los conflictos internos del PSOE, el referéndum de la OTAN y la crisis socialista desatada por el caso Guerra». PRADERA, Javier, “La rendición de cuentas políticas”, *Babelia. Suplemento cultural de El País*, 13 de septiembre de 2003. Asimismo: GIL CALVO, Enrique, “La rendición de cuentas de los responsables electos”, *Revista de Libros*, nº 90, (2004), pp. 16-17; LÓPEZ-BLANCO, Rogelio, “El control de los políticos”, *El Cultural*, 25 de septiembre de 2003.

libro no escapa en muchas de sus partes a realizar los tan característicos “ajustes de cuenta”, especialmente con aquellos dirigentes del socialismo a los que se enfrentó en un momento u otro; la forma –e incluso la valentía– con que se ofrecen una serie de explicaciones en torno a materias sensibles –y que hasta el momento ningún ex-dirigente socialista de tan alto nivel había realizado de tal modo– convierten a la citada obra en una referencia clave para entender –remarcamos una vez más– antes que la evolución ideológica la aplicación de un fuerte pragmatismo en política económica, en lo que el mismo autor denomina como el “síndrome «no hay alternativa»”. NHA, versión hispana del acrónimo TINA que Margaret Thatcher pusiera en su día de moda.

En cualquier caso, han sido desde los sectores más “politizados” del socialismo –frente a los tecnócratas y pragmáticos, precisamente, el ala *socio-liberal*– los que lógicamente han ofrecido mayores análisis al respecto de la realidad ideológica y programática del PSOE. Un hecho, que contrasta con su menor peso tanto en el aparato político como al frente de las tareas gubernamentales. Dentro de estos sectores “más politizados” cabría hacer a su vez otra división: el grupo del llamado “guerrismo intelectual” así como los pertenecientes a la corriente *Izquierda Socialista*. Una división, quizás, un tanto forzada vista desde el presente, pero que nos ayuda para lo que aquí nos interesa, a explicar de mejor forma el papel jugado por cada uno de ellos.

En el primer grupo cabría destacar a cuatro personalidades claves: Ludolfo Paramio, José Félix Tezanos, Francisco Fernández Marugán y el propio Elías Díaz. Próximos siempre al aparato de poder político del entorno guerrista y relacionados con la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Sistema así como con revistas del peso de *Sistema*, *Leviatán* o *Zona Abierta*, jugarían el rol de la “voz de la conciencia” socialista, o mejor dicho, socialdemócrata. Un aspecto que líneas atrás ya destacáramos cuando habláramos de la puesta en marcha de la Comisión del Programa 2000. Sus preocupaciones abarcan diversos temas en lecturas que estuvieron en su día basadas en análisis cercanos al marxismo: desde la propia evolución y retos de la socialdemocracia, pasando por cuestiones de índole sociología, hasta la filosofía del derecho. También resaltar que a diferencia tanto de Maravall como de los componentes intelectuales de “Izquierda Socialista”, como estos mismos “intelectuales” mantendrían un significativo silencio –en la mayor parte de los casos– durante el XXVIII Congreso socialista, momento clave del nacimiento del nuevo socialismo.

Las obras de Ludolfo Paramio (Madrid, 1948) constituyen el ejemplo más definido de esa “voz de la conciencia” socialdemócrata de la que líneas atrás se hablara. Licenciado en periodismo, doctor en Ciencias Físicas y profesor de sociología en varias universidades, se incorporaría al PSOE en julio de 1981 junto con otros “intelectuales”, formando en adelante parte de la *inteligencia socialista*⁴¹⁹. Hombre fuerte dentro del guerrismo durante muchos años, llegaría a ser director de la Fundación Pablo Iglesias. Tras el XXXIII Congreso socialista de 1994 sería nombrado Secretario de Formación de la CE.

Más allá de otras inquietudes, se ha centrado, principalmente, en el análisis del devenir de la *socialdemocracia* a un nivel político a la par que programático. Una preocupación latente desde mediados de los años setenta⁴²⁰. En este sentido, su obra, *Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo* del año 1988 –en la misma fecha que en la revisión del ideario socialista promocionada por Alfonso Guerra– se constituiría en una “suave” crítica de las “desviaciones” del socialismo español frente al empuje del mercado capitalista y de la pérdida de la propia identidad socialdemócrata ante la evolución global de la sociedad⁴²¹. Estamos, de hecho, ante una de los pocos libros que afrontaría la citada crisis desde una perspectiva netamente

⁴¹⁹ Noticia, “Intelectuales de diversas tendencias piden su ingreso en el PSOE”, *El País*, 4 de julio de 1981.

⁴²⁰ PARAMIO, Ludolfo, “El bloque dominante ante la ruptura democrática”, *Zona Abierta*, nº 7, (1976), pp. 3-14; id., “¿Es posible una política socialista?”, *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 77-88; o, id., “El final del desencanto”, *Leviatán*, nº 9, (1982), pp. 17-32.

⁴²¹ Id., *Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo*, Madrid, Siglo XXI, 1988.

socialdemócrata, pero a su vez conciliadora con las nuevas realidades. E igualmente, *Tras el diluvio* constituye una de las escasas aportaciones influidas por el marxismo dentro de este grupo de intelectuales. Temas sobre lo que ha vuelto recientemente, ya desde otros enfoques en *La socialdemocracia*⁴²².

Asimismo Paramio ha sido uno de los pocos socialistas que se interrogarían en su momento por el devenir de la potencialidad analítica marxista, prestando una especial atención a la obra cumbre de Gerald Cohen –*La teoría de la historia de Karl Marx*– y sus posteriores lecturas⁴²³. E igualmente estudiaría –aquí desde una posición claramente partidista y militante– las relaciones entre el PSOE y el movimiento sindical así como sus vinculaciones dentro del Estado del bienestar⁴²⁴.

Si ya vimos a un José Félix Tezanos (Santander, 1946) en funciones de historiador oficial/militante⁴²⁵, sin embargo, su faceta más destacada a la par que más valiosa serían sus importantes contribuciones a la sociología del socialismo, así como a la conformación del potente aparato técnico electoral del PSOE. Así el propio Tezanos estaría tras la creación del Instituto de Técnicas Electorales-Proyectos Sociales y Organizaciones Empresariales (ITE-PSOE).

En este caso más que ante un ideólogo puro estaríamos ante un intelectual al servicio de su organización. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y hoy catedrático de Sociología de la UNED, es también director de la Fundación Sistema –así como de la revista *Sistema*, la más destacada dentro del universo intelectual-académico socialista– y de la revista *Temas para el Debate*. A nivel de currículo político, junto con la ya apuntado, sería Secretario de Formación de la CE del PSOE entre 1988 a 1993.

Tezanos ha contribuido, desde el campo de la sociología, en tres aspectos claves en la configuración del universo intelectual socialista. En primer lugar, se centraría –avanzada la década de los setenta– en el estudio de la estructura de clases en España con una preocupación por el crecimiento cuantitativo como cualitativo de la clase media. Ahí están por ejemplo, *Estructuras de clases y conflictos de poder en la España postfranquista*⁴²⁶ o *¿Crisis de la conciencia obrera?*⁴²⁷, que al mismo tiempo que nos hablan de estos cambios sociales de primer nivel, venían a introducir a su vez las bases analíticas de adaptación del socialismo desde una clara perspectiva electoralista. Bases también en línea con el progresivo distanciamiento del obrerismo y de la pérdida de centralidad del movimiento obrero para el entorno político-intelectual del socialismo español. El segundo gran conjunto de aportaciones de Tezanos versarían en torno a la sociología del socialismo. Su obra central al respecto, *Sociología del socialismo*, constituye uno de los estudios básicos para adentrarnos en cualquier posible historia

⁴²² Id., *La socialdemocracia...*, op.cit..

⁴²³ Id., “Marxismo analítico”, *Claves de Razón Práctica*, nº 7, (1990), pp. 59-65; y, id., “El materialismo histórico como programa de investigación”, *Documentos CSIC*, nº 4, (1992).

⁴²⁴ Id., “La crítica marxista del Estado del Bienestar”, *Sistema*, nº 30-31, (1987), pp. 39-52; id., “Los sindicatos y el sistema político en la España democrática: de la clandestinidad a la huelga general”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 73-82; id., “Estado del bienestar y ciudadanía” en FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás (coord.), *Estado de bienestar: perspectivas y límites*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1998, pp.13-26.

⁴²⁵ Nos remitimos aquí a lo ya apuntado en el apartado “2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: la historia oficial/militante y los «soportes intelectuales» del socialismo español”.

⁴²⁶ Id., *Estructura de clases y conflictos de poder en la España postfranquista*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978.

⁴²⁷ Id., *¿Crisis de la conciencia obrera?* Madrid, Mezquita, 1982. Asimismo entre otros muchos títulos: id., “La teoría marxista de las clases, los cambios en la estructura de clases en la España actual y la alternativa socialista”, *Sistema* nº 29-30, (1979), pp. 181-210; id., *¿Crisis de la conciencia obrera?* Madrid, Mezquita, 1982; o, id., “Cambio social y modernización en la España actual”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 28, (1984), pp. 19-62.

social a la par que política del PSOE⁴²⁸. En base a un conjunto de encuestas procedentes diferentes congresos socialistas, allí se elabora un fiel retrato político, ideológico como sociológico desde el militante, pasando por el cuadro político hasta el dirigente. Un estudio prácticamente único dentro del estudio de los partidos políticos en España.

La tercera aportación del Catedrático de Sociología de la UNED se centraría en cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. Desde la concertación social, pasando por el mundo del trabajo así como la nueva división de clases, ocuparían parte de su atención durante la segunda mitad de los años ochenta principalmente⁴²⁹. Destacar, asimismo, que durante los últimos años Tezanos –al igual que otros socialistas como Maravall– ha incidido en unas de las grandes preocupaciones de la socialdemocracia: la calidad y resultados de las democracias avanzadas. Especialmente a través de la celebración de los diferentes *Foros sobre Tendencias Sociales*, que tienen lugar periódicamente en la ciudad de Salamanca⁴³⁰.

El caso de Francisco Fernández Marugán (Cáceres, 1946) es ostensiblemente diferente a los anteriores. Aunque en el capítulo 5 volveremos a hablar de su papel al frente del equipo que se conforma entorno a Alfonso Guerra en Presidencia de Gobierno⁴³¹; nos encontramos aquí no sólo con un “hombre de aparato” sino con uno de los más influyentes estrategas económicos antes, de nuevo, que un intelectual propiamente dicho. De hecho, se trata de uno de los pocos economistas socialistas que posteriormente ha escrito sobre su experiencia⁴³². Economista de profesión –como decíamos– y miembro del Cuerpo Técnico de Inspectores Financieros y Tributarios, tras su salida como Subdirector General del Gabinete de Presidencia (1982-1984) se implicaría a fondo en las tareas del Partido así como en el Grupo Parlamentario, en donde se convertiría en el portavoz de Asuntos Económicos. Nombrado Secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales en el XXXI Congreso (1988) –cargo en el que permanecería hasta el XXXIII Congreso del PSOE (1994)– llevaría a cabo la no fácil tarea de la legitimación partidista de la política económica de los ejecutivos socialistas.

De la misma forma, a Marugán le correspondería la no fácil tarea durante la primera legislatura socialista de combinar, al mismo tiempo, la defensa de la política económica y social de los gobiernos socialistas –promovida, precisamente, por los sectores tecnocráticos y liberales encabezados por Boyer y Solchaga– y de amoldar tal realidad a las tesis guerristas. A él se le debe (presumiblemente) la redacción de una serie de informes en nombre de la CE del PSOE, en donde se *blanquearía* la realidad socioeconómica del país, y con los que el partido trataría de

⁴²⁸ Id., *Sociología del socialismo español*, Madrid, Tecnos, 1983. En este mismo sentido también: id., “El espacio político del socialismo español”, *Sistema*, nº 32, (1979), pp. 51-76; id., “Estructura y dinámica de la afiliación socialista en España” en *Partidos políticos y participación política en España*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios Políticos*, nº 23, (1981), pp. 117-152; id., “Radiografía de dos Congresos: una aportación al estudio sociológico de los cuadros políticos del socialismo español”, *Sistema*, nº 35, (1980), pp. 79-100. Asimismo, id., “Continuidad y cambio en el socialismo español: el PSOE durante la transición democrática”, *Sistema*, nº 68-69, (1985), pp. 19-60; y id. (ed.), *Teoría política del socialismo*, Madrid, Fundación Sistema, 1993.

⁴²⁹ Id., “El sentido político de la concertación social” en *Estado de Bienestar y opciones de política económica*. Dossier monográfico, *Sistema*, nº 80-81, (1987), pp. 157-170; id., *La democratización del trabajo*, Madrid, Sistema, 1987; id., *El trabajo perdido: ¿hacia una civilización postlaboral?* Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. Desde otra perspectiva: id., *La sociedad dividida: estructura de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.

⁴³⁰ Id., “La democracia industrial como horizonte político”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 3-10; id., “Neoliberalismo, socialismo y democracia”, *Sistema*, nº 145-146, (1998), pp. 17-33; id., *La democracia incompleta: el futuro de la democracia postliberal*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002; GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La calidad de la democracia, las democracias del siglo XXI (VII Encuentro Salamanca)*, Madrid, Sistema, 2009.

⁴³¹ Sobre su trayectoria véase Capítulo 5, nota 57.

⁴³² Otros dos casos casi excepcionales en, VELASCO, Luis, *Políticas del PSOE...*, op.cit.; o, MARTÍN SECO, Juan Francisco, *¿La economía, estúpidos...*, op.cit..

demostrar el rostro social y a su vez el espíritu socialdemócrata de su política⁴³³. Documentos, que, a pesar, de haber pasado desapercibido nos ofrecen uno de los mejores diagnóstico en torno a cómo entendieron los socialistas su acción gubernamental.

Articulista en numerosas revistas del entorno del PSOE –por ejemplo, *Sistema* o *Temas para el Debate*– a medio camino entre la política y el tono académico, ha incidido no sólo en la defensa de la política económica socialista, sino especialmente en el examen de los procesos de concertación social⁴³⁴. De forma destacada, se ha de reseñar su contribución a la obra colectiva *La década del cambio*. Un texto que llevaría por título, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica”⁴³⁵. Verdadero compendio de las bondades de la acción gubernamental de los gobiernos socialistas.

Cerramos este primer bloque con las aportaciones de Elías Díaz (Salamanca, 1934). Si una figura se puede calificar como de intelectual en el caso del socialismo español es la del propio Díaz. No sólo por el hecho de que no ocupará altos cargos políticos tanto dentro del Partido como del Gobierno, sino ante todo por su neto perfil académico. A diferencia de buena parte del resto de sus “compañeros” intelectuales, conocería los embistes de la represión franquista, lo que le llevaría a sufrir destierro y confinamiento. El hoy Catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, colaboraría con el PSOE en la comisión encargada de redactar el proyecto socialista de Constitución. Asimismo sería director del Centro de Estudios Constitucionales y tiempo más tarde director de la importante revista *Sistema*. De igual forma, se ha de destacar su papel como cofundador de *Cuadernos para el Diálogo*.

Encuadrado en lo que se conoció durante los noventa como el “guerrismo intelectual”, se le debe uno de los mayores esfuerzos por dotar al socialismo de un constructo intelectual. *Socialismo en España: el partido y el estado* constituye, de hecho y por derecho, una obra básica para entender –siempre desde una perspectiva crítica a la par que distante de cualquier tentación “oficialista”– la profunda transformación del socialismo en la España de los primeros años ochenta⁴³⁶. Siempre bajo una perspectiva en donde la ética constituye la principal base analítica, aportaría obras de la importancia como *Notas para la historia del pensamiento español*⁴³⁷, y más recientemente *De la Institución a la Constitución: política y cultura en la España del siglo XX*⁴³⁸.

⁴³³ Entre otros, PSOE-CEF, Secretaria de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, *La política económica de...*, op.cit.; [AHFPI, sig. B 3482]; AHFPI, PSOE-CEF, “La política social (1983-1987)”, Madrid, abril de 1988, sig. Fc 6817. Por lo demás, y frente a la tesis de otros tantos compañeros de ‘partido’ que incidieron como Maravall en el carácter liberal o en las ciertas afinidades del socialismo con las clases dominantes y la política pro-capitalista –como sería el caso de Ignacio Sotelo– siempre ha mantenido –más allá de las evidencias y demás datos contrastables– el carácter socialdemócrata de los gobiernos socialistas. Un último ejemplo en, FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “El PSOE necesita plantear una oferta viable”, *El País*, 28 de febrero de 2012.

⁴³⁴ COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Situación, interpretaciones y opciones de política económica”, *Sistema*, n° 89, (1989), pp. 17-28; id., “Las políticas europeas de concertación social y democracia industrial”, *Sistema*, n° 91, (1989), pp. 17-28; id., “La construcción de una sociedad del bienestar en el contexto de la economía española”, *Sistema*, n° 94-95, (1990), pp. 51-66; id. y COLLADO, Juan Carlos, “Recuperación económica y políticas de redistribución en España. 1986-1989”, *Sistema*, n° 97, (1990), pp. 11-27.

⁴³⁵ Id., “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit.. Así como en, id., “El pacto social y las relaciones laborales en España”, *Leviatán*, n° 51-52, (1993), pp. 5-14; y, finalmente, id., “El PSOE y el retorno de los viejos problemas”, *Sistema*, n° 135, (1996), pp. 5-28.

⁴³⁶ DÍAZ, Elías, *Socialismo en España: el partido y el estado*, Madrid, Mezquita, 1982. Véase aquí igualmente, id., “Ideologies in the Making of the Spanish Transition” en HEYWOOD, Paul (ed.), *Politics and policy...*, op.cit., pp. 26-39.

⁴³⁷ Id., *Notas para la historia del pensamiento español actual*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978. Véanse igualmente: id., *Estado de Derecho y sociedad democrática*, Madrid, Taurus, 1984; id.,

Por lo demás, la “voz crítica” del PSOE correría a cargo de los intelectuales de la corriente de *Izquierda Socialista*. Tiene pendiente la historiografía un estudio detenido de esta corriente interna, que nacería tras el XXVIII Congreso del PSOE y que se constituiría como tal en noviembre de 1980. Una corriente siempre minoritaria dentro del socialismo, que terminaría por convertir en el altavoz –junto con la dirección confederal de la UGT– de las *desviaciones liberales* de los gobiernos socialistas personificadas en el propio Felipe González. Críticas que terminarían en conocidos enfrentamientos y reprobaciones como en el caso de la posición adoptada por el PSOE en el referéndum de la OTAN en 1986.

Formada, en un principio, por los defensores de la definición marxista del PSOE, ya como corriente interna del PSOE se diluiría su carácter crítico marxista inicial en un enfoque cada vez más orientado a la defensa del carácter socialdemócrata del Partido. Más allá de las publicaciones iniciales de Francisco Bustelo, Pablo Castellano pero ante todo de Luis Gómez Llorente –su máxima figura intelectual en aquellos primeros compases, aunque con pocas contribuciones significativas al respecto⁴³⁹– se han destacar las aportaciones de Ignacio Sotelo como del ya citado Antonio García Santesmases, en relación al núcleo central de nuestra investigación. Han sido, precisamente, este conjunto de autores quienes siempre desde dentro del PSOE irían mucho más allá de la “crítica socialdemócrata” del sector guerrista, para situarse en una posición de enfrentamiento, en ocasiones total, con el devenir de los ejecutivos socialistas. De hecho, no dudarían de tildar la política económica socialista como liberal cuando no neoliberal. Situación política a la par que intelectual que a muchos de los citados les llevaría a darse de baja del PSOE durante la década de los ochenta.

Nacido en Madrid en 1936 en Ignacio Sotelo confluye muchas preocupaciones que van desde las ciencias políticas a la sociología. Doctor en Sociología y profesor visitante en universidades europeas –por ejemplo, en la Universidad Libre de Berlín– y latinoamericanas, viviría también en primera persona la represión franquista. Militante del PSOE antes de finalizar la dictadura, jugaría un papel clave al frente de la Secretaría de Cultura de la CE del PSOE entre 1976-1984. Desde ese mismo puesto no sólo se convertiría en un testigo excepcional de la transición socialista y su posterior conquista del poder político, sino también de las interioridades de una organización tan compleja como el PSOE. Reconocido articulista de *El País* y en su momento de *Diario 16*, desde aquellas mismas tribunas cuestionaría duramente la gestión socialista en el poder desde el primer momento.

Aunque participaría en el debate del XXVIII Congreso socialista –véase, al respecto, su contribución, “Socialismo y marxismo”⁴⁴⁰– lo haría desde una posición secundaria. En cualquier caso, es de destacar, siempre desde una visión crítica e incómoda para la dirección federal del PSOE, sus obras de los primeros años ochenta. Junto con el libro *El socialismo democrático*⁴⁴¹ en donde se avisaba de futuros problemas por venir, sus contribuciones en la revista de *Leviatán* –*Paradojas y aporías de los socialistas en el poder*⁴⁴² y *Poder institucional y hegemonía social*⁴⁴³– constituirían los primeras y más duras críticas contra la forma de entender y actuar

“Pensamiento socialista durante el franquismo” en JULIÁ, Santos (coord.), *El socialismo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 367-399; id., *La democracia en España: el legado socialista de la Ilustración*, Madrid, Fundación Alternativas, 2011.

⁴³⁸ Id., *De la Institución a la Constitución: política y cultura en la España del siglo XX*, Madrid, Trotta, 2009.

⁴³⁹ Especialmente, GÓMEZ LLORENTE, Luis, “Introducción” en CLAUDÍN, Fernando [et al.], *Teoría socialista del Estado*, Madrid, Mañana, 1978; y también, id., *Aproximación a la historia del socialismo español*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1972; id., *La ética del pablismo*, Madrid, Fundación Progreso y Cultura [2008].

⁴⁴⁰ SOTELO, Ignacio, “Socialismo y marxismo”, *Sistema*, nº 29-30, (1979), pp. 15-26.

⁴⁴¹ Id., *El socialismo democrático*, Madrid, Taurus, 1980.

⁴⁴² Id., “Paradojas y aporías de los socialistas en el poder”, *Leviatán*, nº 13, (1983), pp. 7-18.

⁴⁴³ Id., “Poder institucional y hegemonía social”, *Leviatán*, nº 16, (1984), pp. 47-56.

desde el poder los socialistas. Un progresivo distanciamiento que le llevaría a dejar sus cargos orgánicos dentro de la organización. En 1986 publicaría una recopilación de artículos que bajo el título *Los socialistas en el poder*, se transformaría en uno de los mejores retratos de las citadas “desviaciones liberales” de los gobiernos socialistas así como de su forma interpretar y relacionarse con la sociedad⁴⁴⁴. Desde entonces, en adelante, se centraría en la evolución de la socialdemocracia con obras como *El desplome de la izquierda*⁴⁴⁵ o la propia crisis del *Estado social*⁴⁴⁶.

Antonio García Santesmases (Madrid, 1954) es el más joven de los aquí citados socialistas. Doctor en Filosofía con una tesis que llevaría por título, *Marxismo y Estado* en donde se profundizaba en esa siempre problemática relación⁴⁴⁷; se convertiría durante muchos años en el portavoz de la corriente de Izquierda Socialista, tras la expulsión de Pablo Castellano del PSOE.

Catedrático de Filosofía Moral y Política en la UNED, entraría a militar en el PSOE en 1976 de la mano, de entre otros, del propio Ignacio Sotelo. Marcado desde el principio por su pertenencia a Izquierda Socialista, y por su proximidad a las tesis de Nicolás Redondo, tendría un protagonismo destacado en la ruptura de la familia socialista durante el antes y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Miembro en más de una ocasión del Comité Federal, aunque no de su Comisión Ejecutiva, destacaría en dichos órganos por los constantes enfrentamientos con el propio González y por ende con la dirección federal a raíz tanto de la OTAN como por las políticas sociales y económicas. Integrado desde su función en 1990 en el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) –foro de debates a la par que grupo de presión de los críticos de diferente procedencia del PSOE– y diputado nacional por Madrid entre 1996 y 2000, también formaría parte del consejo de redacción de *Leviatán* así como es colaborador de la revista *Sistema*.

Desde “doble influencia militante y reflexiva, teórica y práctica” reclamada por el propio Santesmases en más de una ocasión⁴⁴⁸, desde muy temprano –y en línea con las tesis del propio Ignacio Sotelo– advertiría de los peligros que acechaban al socialismo en su constante avance del mero pragmatismo frente a lógica política. En *Las dos opciones del PSOE*⁴⁴⁹ –en pleno debate del XXVIII Congreso– pero especialmente en *Los límites infranqueables*⁴⁵⁰ –se advierten estas preocupaciones en tono cada vez más crítico. Resulta también de interés reseñar su contribución a la obra colectiva editada por la Fundación de Investigaciones Marxistas, que

⁴⁴⁴ Id., *Los socialistas en el poder*, Madrid, El País, 1986. Allí decía, entre otras muchas cuestiones: «[d]esde 1976, en líneas generales, el socialismo español ha acertado; los éxitos superan con mucho los errores y fracasos. Justamente porque existen motivos sobrados para el alborozo, no entiendo el porqué de esa falta de tolerancia y de buen estilo democrático en las relaciones en el interior del partido y de éste con la sociedad». *Ibidem*, pp. 11-12. Y años más tarde: id., “Socialismo” en MELLÓN, Joan Antón (ed.), *Ideologías y movimientos políticos contemporáneos*, Madrid, Tecnos, 1988, pp. 273-284.

⁴⁴⁵ Id., *El desplome de la izquierda: modalidades españolas del fin de una época*, Madrid, Akal, 1994; y, id., *A vueltas con España*, Madrid, Gadir, 2006.

⁴⁴⁶ Id., *El estado social: antecedentes, origen, desarrollo y declive*, Madrid, Trotta / Fundación Alfonso Martín Escudero, 2010.

⁴⁴⁷ GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Marxismo y Estado*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986.

⁴⁴⁸ «El haber podido participar activamente en algunos de los debates sobre los que investigo y el haber podido discutir durante estos años con personas ajenas a la pura inmediatez del tema, es lo que marca una doble influencia militante y reflexiva, teórica y práctica, que espero que haya sido fecunda». GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Repensar la izquierda...*, *op.cit.*, p. 9. Véase asimismo: id., “Cinco tareas para los intelectuales de la izquierda” en ÁGUILA, Rafael del (coord.), *Los intelectuales y la política*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2003, pp. 87-124.

⁴⁴⁹ Id., “Las dos opciones del PSOE”, *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 37-48.

⁴⁵⁰ Id., “Los límites infranqueables”, *Leviatán*, nº 10, (1982), pp. 13-31

llevaría por título, *El bienio socialista en perspectiva. Evolución ideológica del socialismo en la España actual*⁴⁵¹. Allí nos encontramos con un completo balance de la acción del gobierno entre 1982 y 1984, en donde se constataban los anuncios realizados con anterioridad.

En todo caso es su monografía *Repensar la izquierda* –de cuya importancia ya se ha dejado constatada prueba– su principal contribución. Si antes hablamos del valor de *El control de los políticos* de Maravall, otro tanto se puede decir de la misma en estas líneas. Referencia básica, tres de sus epígrafes son de obligada lectura: “IV. La permanencia de España en la OTAN y el final de la transición política”; “V. El socialismo de los años ochenta”; y “Apéndice. El pensamiento socialista”, en donde repasa las aportaciones de Maravall, Tierno Galván, Sotelo, Claudín y de Elías Díaz. De especial relevancia es el citado quinto apartado. En el mismo se lleva a cabo una de las críticas más lucidas de la evolución ideológica del socialismo así como de sus consecuencias, en lo que termina constituyéndose en un retrato –a veces– desolador del tránsito del socialismo desde 1979 hasta finales de la década los ochenta⁴⁵².

«¿Por qué los políticos españoles actuales no escriben buenas memorias? Varias de la transición resultan de interés pero, por desgracia, las de dirigentes socialistas resultan más bien irrelevantes [...]. Da la sensación de que se pueda emprender la tarea de escribirlas sin documentos a la mano, sin autocrítica y sin preguntarse por la esencia de la propia trayectoria. El resultado suele dar la impresión de desgana, liquidación de cuentas con el adversario o de tarea obligada pero ingrata».

Javier Tusell, *Ni tan perverso, ni tan astuto*⁴⁵³.

Antes de entrar en materia propiamente dicha así como de ofrecer una explicación al interrogante formulado por el propio Javier Tusell, detengámonos en cómo concibieron los dirigentes socialistas sus particulares memorias, así como los objetivos que perseguían con las mismas. Por un lado, destacar que la sinceridad no ha sido un valor en alza en este tipo de literatura, a excepción del siempre caso particular de Joaquín Almunia:

«El lector no tiene entre sus manos, en todo caso, un libro de historia. Ése no es mi oficio, ni era mi propósito. Sólo he querido aportar mi visión personal, aunque uno de los motivos que

⁴⁵¹ Id., “El bienio socialista en perspectiva. Evolución ideológica del socialismo en la España actual” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., pp. 29-49 [un texto revisado que se publicaría también en, id., “Evolución ideológica del socialismo en la España actual”, *Sistema*, nº 68-69, (1985), pp.61-78]; VARGAS-MACHUCA, Ramón A., OBIOLS, Raimon, DÍAZ, Elías, id., “Las señas del socialismo español”, *Leviatán*, nº 37, (1989), pp. 53-93; y, id., “Democracia de partidos y democracia en los partidos” en TEZANOS, José Félix (ed.), *La democracia post-liberal*, Madrid, Sistema, 1996, pp. 351-372.

⁴⁵² Id., *Repensar la izquierda...*, op.cit., pp. 180-251.

⁴⁵³ TUSELL, Javier, “Ni tan perverso, ni tan astuto”, *Babelia. Suplemento cultural de El País*, 3 de julio de 2004. Un tiempo antes escribiría al respecto: «Un papel muy importante le corresponde siempre a los testimonios de los protagonistas relevantes, los actores fundamentales de la vida política. Son muchos los que, pasado el momento en que desempeñaron ese papel, aseguran que un día escribirán sus memorias; pocos los que, finalmente, lo hacen. En ocasiones, el propio protagonista histórico no es capaz de distinguir entre la esencia y la anécdota; en otras, prefiere una visión demasiado edulcorada o vitriólica, según se trate de amigos o de adversarios. Sólo una minúscula porción de individuos es capaz de escribir desde la distancia y la ironía. Hay protagonistas que, simplemente, no saben expresarse a través de unas memorias porque, en primer lugar, un político no es necesariamente una persona capacitada para la escritura y, en segundo término, porque el género memorialístico implica una serie de requisitos que no siempre se tienen en cuenta de modo adecuado». Id., “Prólogo. La época socialista entra en la Historia” en IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 22.

también me ha animado a escribir ha sido que esa visión pudiese servir en su día a los historiadores como una materia prima más, entre muchas, con la que puedan elaborar sus trabajos»⁴⁵⁴.

El propio Carlos Solchaga también dejaría claros sus propósitos en sus singulares “memorias”:

«En lo único que pudieron convencerme fue en su propuesta unánime de que modificara el enfoque del mismo e hiciera de esta obra un testimonio político y defensa de mis opiniones. No era ése mi propósito, convencido como estoy de que los testimonios sólo los presentan, a modo de testamento, quienes han dado por concluidas sus andanzas políticas. Como éste no es mi caso, he preferido un enfoque de reflexión sobre algunos de los problemas de la elaboración y ejecución de la política económica española»⁴⁵⁵.

No es casual, por tanto, que “irrelevantes” fue el adjetivo que el profesor Javier Tusell empleó para describir las memorias de los dirigentes socialistas, aunque la graduación entre unas y otras dependiera del personaje en cuestión y su “valía intelectual”. Las “memorias políticas” de los dirigentes socialistas que ocuparon cargos de relevancia durante los gobiernos del PSOE, hasta el momento, pocas cuestiones han aportado que no se conocieran de forma previa. Todo ello teniendo, además, presente de que este amplio y hoy heterogéneo “grupo político”, haya sido en comparación con otros políticos de izquierda a derecha, el más prolífico a la hora de publicar sus vivencias. Cerca de una veintena de memorias se pueden contabilizar de políticos socialistas, que, en un momento u otro, ocuparon cargos de representación tanto en el Partido como en el Gobierno.

Muchas de las mismas estuvieron precedidas, dependiendo de la trayectoria política del autor, de cierta expectación, y acompañadas en casi todos los casos por el lanzamiento de importantes campañas de difusión editorial. Expectativas que si bien pudieron satisfacer al lector interesado, como venimos insistiendo para el análisis histórico, una tras otra, han ido eliminando las escasas “esperanzas” de encontrar algún elemento e información apreciables. Y pese a todo, estos “materiales” han de tenerse presentes tanto de cara a examinar la “cultura política” del socialismo, así como en relación a desentrañar los argumentos/pretextos justificativos de sus diferentes trayectorias políticas.

Lo dicho hasta ahora puede conducir dos interrogantes o hipótesis: o bien, sobre la historia del socialismo español, tanto a nivel de Partido como de Gobierno, los grandes hechos son sobradamente conocidos, y por tanto la labor del historiador se reduciría a la mera interpretación así como al escrutinio o relectura de datos consabidos; o por el contrario, cabría pensar que esta *irrelevancia* podría ser fruto de ciertas premuras por ajustar cuentas con el pasado, incluidas aquí otras cuestiones más profanas relacionadas con exigencias editoriales⁴⁵⁶.

⁴⁵⁴ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas*, Madrid, Taurus, 2001, p. 17 [existe una versión ampliada de las mismas con el mismo título en, Madrid, Suma de Letras, 2002]. Y unas páginas más adelante ofrecía una posible respuesta al interrogante de Tusell: «Hasta ahora no han sido muchos los socialistas de mi generación que han puesto por escrito su visión personal de lo que ha sucedido en España desde el comienzo de la transición, y de nuestro papel en todo ese tiempo. No sé cuál pueda ser la razón de que sea así. Quizás se deba al hecho de que muchos dirigentes del partido o de los componentes de los gobiernos de Felipe González estén aún desempeñando puestos de responsabilidad o se sientan todavía demasiado jóvenes como para retirarse a escribir sobre su propio pasado [...]. ¿Es ésa una tarea reservada a quienes no tienen ya otras cosas que hacer?». *Ibídem*, p. 15.

⁴⁵⁵ SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad dorada*, Madrid, Taurus, 1999, p. 9.

⁴⁵⁶ El ejemplo por excelencia, de nuevo, sería el caso de Carlos SOLCHAGA, Ministro de Industria y posteriormente de Economía de los gobiernos socialistas, quien en sus citadas memorias lleva a cabo un detallado repaso y justificación de sus actuaciones, que tiene por fin no sólo legitimar a posteriori el carácter liberal de las políticas económicas de los gobiernos socialistas, sino además contrarrestar los argumentos ‘sociales’ o ‘sindicales’ que desde la UGT se lanzaron contra su gestión. Véase, en concreto, el capítulo V, “El desempleo” en *ibídem*, pp. 159-194.

Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que las “memorias socialistas” –que conforman todo un “género literario”– han estado impregnadas de cierta superficialidad. Igualmente han estado caracterizadas por omitir –o directamente “callar”– en torno a determinados aspectos relevantes de la gestión socialista, a lo que se añade la escasa documentación aportada de sus archivos personales⁴⁵⁷. A lo que se suma, como aquellos detalles o aportaciones que se presentarían en su momento como “relevantes” o “novedosos”, si bien lo hubieran podido ser en su tiempo histórico, pasados los años dichas *revelaciones* tendieron a ofrecer el clásico titular periodístico. Incluso las propias estructuras de las memorias son parecidas, y en su mayor parte responderían a una sucesión de puntos biográficos coincidentes cronológicamente (infancia, disidencia-oposición antifranquista, militancia en el PSOE, tareas del Gobierno, justificación de la biografía política correspondiente).

Más allá de pequeñas matizaciones sobre unos mismos hechos, que, en todo caso, no modifican el discurso “institucional” u “oficioso” que se desprende de estas mismas “memorias socialistas”; el elemento más notorio compartido es la ausencia de crítica y autocrítica frontal hacia la gestión de los ejecutivos socialistas, exceptuando, claro está, la de que aquellos militantes o dirigentes críticos que, antes o después, terminarían abandonando o siendo expulsados de la organización. Líneas más adelante, nos detendremos en esta misma cuestión. Ahora bien, volviendo a las características de esta tendencia acrítica cuando se profundiza en la misma, se detecta otros elementos harto significativos de la “cultura política del socialismo español”. Nos referimos, a la configuración de lo que se pudiera catalogar como la “memoria generacional socialista”. Una memoria colectiva estructurada en base a la construcción de un relato lineal que más allá de algunas valoraciones distantes –antes que críticas o reflexiones de calado propiamente dicho– en ningún caso cuestionaría tanto los fundamentos de la *misión histórica* del socialismo español, como la necesidad no discutible del proyecto de modernización socialista. He aquí los dos grandes puntos de unión de este conjunto de memorias.

Desde una perspectiva a medio plazo, la mayor parte de las memorias socialistas se publicarían en los años noventa. Desde las de Julio Feo⁴⁵⁸, pasando por Gregorio Preces-Barba⁴⁵⁹ o la de quienes fueran ministros como Jorge Semprún⁴⁶⁰ –probablemente una de las más interesantes a la par que más brillantes– o la citada de Carlos Solchaga⁴⁶¹, las mismas abrirían el camino a otros tantas. Después de este pequeño *boom memorialístico*⁴⁶², iniciado el nuevo siglo tan sólo un pequeño número de memorias fueron publicadas –Joaquín Almunia⁴⁶³, Eduardo Sotillos⁴⁶⁴, Fernando Morán⁴⁶⁵...– procediéndose desde entonces a un

⁴⁵⁷ «No trato en estas reflexiones de hacer un análisis exhaustivo, ni una investigación sobre aquella segunda legislatura que duró de 1982 a 1986, aunque tengo mucha documentación para poder hacerlo», declaraba PECES-BARBA, Gregorio, *La democracia en España. Experiencias y reflexiones*, Madrid, Temas de Hoy, 1996.

⁴⁵⁸ FEO, Julio, *Aquellos años*, Barcelona, Ediciones B, 1993. Y más recientemente, id., *Déjame que te cuente*, Madrid, Espejo de Tinta, 2008.

⁴⁵⁹ PECES-BARBA, Gregorio, *La democracia en...*, op.cit..

⁴⁶⁰ SEMPRÚN, Jorge, *Federico Sánchez se despide de ustedes*, Barcelona, Tusquets, 1993.

⁴⁶¹ SOLCHAGA, Carlos, *El final de...*, op.cit..

⁴⁶² Otras memorias publicadas en estos años: LEGUINA, Joaquín, *Defensa de la política*, Barcelona, Ediciones B, 1995; BONO, José, *A vueltas con el futuro: reflexiones para la renovación del socialismo*, Madrid, Temas de Hoy, 1995; o, BARRIONUEVO, José, *2001 días en Interior*, Barcelona, Ediciones Grupo Zeta, 1997; RODRÍGUEZ IBARRA, José Luis, *Rompiendo cristales: treinta años de vida política*, Barcelona, Planeta, 2008.

⁴⁶³ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, op.cit..

⁴⁶⁴ SOTILLOS, Eduardo, *1982, el año clave*, Madrid, Aguilar, 2002.

⁴⁶⁵ MORÁN, Fernando, *Palimpsesto: a modos de memorias*. Madrid, Espasa Calpe, 2002.

frenazo en seco, que coincidiría con la victoria socialista en las elecciones generales del año 2004.

Dentro de la “irrelevancia” de estas memorias, en todo caso, puede llevarse a cabo una división a *grosso modo* entre aquellas realizadas por dirigentes del PSOE, que a pesar de sus diferencias y divergencias en un momento u otro con la estrategia socialista, terminarían – y en muchos continúan ejerciendo– su labor dentro del Partido; y las que aquellos a quienes la propia evolución del socialismo, tanto a nivel interno como a nivel gubernamental, terminaría alejándolos del PSOE para bien terminar en la otra *izquierda*, o bien, para abandonar la actividad política. En cualquier caso, a pesar de esta división aquí planteada – discutible, lógicamente, como otras tantas formuladas hasta el momento– unas como otras, repetimos, contienen un relato parecido de unos mismos acontecimientos, limitándose las principales diferencias a pequeños detalles o ajustes de apreciación que, en más de una ocasión, tienen que ver menos con los hechos antes que con determinadas justificaciones a posteriori.

A todo ello también debe añadirse dos últimas características relevantes: por un lado, la práctica ausencia de memorias de políticas del socialismo español⁴⁶⁶, pese a que las mismas sin tener una presencia nutrida ni en los órganos de dirección, en no pocos casos sí ostentaron importantes cargos de representación política e institucional; y en segundo lugar, muchos de los políticos socialistas que en su momento publicaron sus obras siguen en activo, al igual que sucede con otros tantos políticos de otros partidos, lo que confirma la *singularidad* de las “memorias políticas” en España.

En el primer bloque, destaca –como no podía ser de otra manera y a la espera de las memorias de Felipe González⁴⁶⁷ y de Miguel Boyer⁴⁶⁸– las de Alfonso Guerra. *Cuando el tiempo nos alcanza* (2004) y *Dejando atrás los vientos* (2006), han sido sus títulos, respectivamente⁴⁶⁹. Todo ello a la espera a su vez de un tercer volumen que cierre –de una vez– esta esperada trilogía. Dos volúmenes que vienen a confirmar todos y cada uno de los cánones clásicos del paradigma del proyecto de modernización, y ello a pesar de quien las

⁴⁶⁶ Entre las escasas memorias publicadas: ALBERDI, Cristina, *El poder es cosa de hombres*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2001; y SAUQUILLO, Francisca, *Mirada de mujer*, Barcelona, RBA, 2002.

⁴⁶⁷ El que fuera Presidente del Gobierno desde que perdiera las elecciones de 1996, ha venido publicando algunas reflexiones o posicionamientos políticos, lejos, en cualquier caso, de unas ‘memorias políticas’ propiamente así entendidas: GONZÁLEZ, Felipe y CEBRIÁN, José Luis, *El futuro no es lo que era*, Madrid, Suma de Letras, 2002; id., *Memorias del futuro: reflexiones sobre el tiempo presente*, Madrid, Aguilar, 2003.

⁴⁶⁸ Más allá de lo apuntado en el Capítulo 5, *nota 33*, Miguel Boyer, al menos, ha publicado en estos años dos importantes trabajos entre lo *académico* y lo *memorialístico*. En realidad, en ambos casos se mantienen los mismos argumentos y en la práctica la misma estructura. No obstante, son lo más cercanos –como decíamos– a unas posibles memorias con una infinidad de datos y reflexiones a tener presentes: BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas. 25 años de economía y sociedad españolas*, Madrid / Barcelona, Marcial Pons, 2005, pp. 81-130; y, id., “El segundo ajuste económico de la democracia española (diciembre de 1982-julio de 1985)” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, op.cit., vol. VIII, pp. 293-304. El conocido economista Joaquín Estefanía señalaría al respecto de este trabajo lo siguiente: «Para elaborar este parte del libro he encontrado un extraordinario manuscrito, inédito durante bastante tiempo y publicado en el año 2004 dentro de una obra colectiva en la que difícilmente se puede prever que incorpore tal texto, de importancia capital para el análisis de la primera década socialista en el Gobierno. Se trata de una mezcla de testimonio intelectual y memorias». Añadiendo en otra parte: «[El texto] merece una divulgación más amplia y académica». ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, op.cit., pp. 242 y 243, *nota 3*.

⁴⁶⁹ GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982)*, Madrid, Espasa, 2004; y, id. *Dejando atrás los vientos. Memorias (1982-1991)*, Madrid, Espasa, 2006.

escribe es el mismísimo Alfonso Guerra, la presupuesta voz de la “conciencia socialdemócrata” del PSOE.

Si el éxito de unas memorias dependiera de las reseñas y del número de ventas, sin duda, Alfonso Guerra lo habría alcanzado con soltura⁴⁷⁰. Ahora bien, si de lo que se trataba eran de ofrecer unas memorias políticas que explicarían y detallarían los motivos que guiaron su trayectoria biográfica-política, desde el rigor y la honestidad personal que se las debe presumir de entrada, entonces los dos citados volúmenes publicados han de encuadrarse en el mismo nivel de otros relatos similares. Si se eliminan los permanentes ajustes de cuentas, sus consabidas formulaciones sobre el “destino mesiánico” del socialismo y sobre los roces, disputas y conflictos con sus compañeros de Partido y de Gobierno, nos encontramos con unas memorias vacías, carentes de interés, si lo que se pretendían, en verdad, era aportar su perspectiva personal de los acontecimientos que vivió y que protagonizó. Lejos, muy lejos, de las de Jorge Semprún⁴⁷¹ –uno de sus declarados “enemigos”– o de las Enrique Tierno Galván⁴⁷² –una de las mejores cabezas pensantes del socialismo más allá de siglas– se encuentran las mismas en cuanto a estilo o prosa, por más que el autor se nos presente como un refinado intelectual y poeta. De esta forma, Guerra, por tanto, se auto describe más en función de su imagen exterior que tanto supo cultivar que en su propio devenir interno.

Ahora bien, pese a todo lo dicho aquí, si estas memorias resultan de especial importancia, primero, es porque hasta el momento ningún otro alto dirigente socialista había publicado sus vivencias y reflexiones sobre el periodo. En segundo lugar, se nos (auto)presenta en las mismas, a un político especialmente astuto que desde su posición de Vicesecretario General del PSOE durante casi un cuarto de siglo así como Vicepresidente del Gobierno entre 1982-1991, se convertiría en el “cerebro” de la reconstrucción del socialismo español, al mismo tiempo que encabezaría la estrategia hacia la conquista del poder político y su posterior gestión.

Así pues, un análisis detenido de las memorias de Alfonso Guerra si bien poca información “nueva” aporta sobre la historia del socialismo, en cambio, nos ofrece un “recorrido” por los que serían los cánones generacionales de la generación que protagonizó el “cambio”. Este último entendido tanto en sus aspectos identitarios como en la proyección que los propios dirigentes socialistas tienen de sí de su paso por el Gobierno. Es decir, nos estamos refiriendo a su “memoria histórica colectiva” así como la ascendente exterior de su propia “cultura política”. De esta forma, la valía de las mismas –desde un punto de vista histórico– reside en el hecho de nos proporciona nos pocas “pistas” de cara a entender mejor toda una serie de lugares comunes, sobre las que el socialismo se ha sustentado de cara justificar su “misión histórica generacional”.

En contraste con lo anterior habría que reseñar las memorias políticas de Joaquín Almunia. Publicadas en 2001 –tres años antes que las de Guerra– se afrontan las mismas desde una *mirada crítica* y con *rasgos de sinceridad* –eso sí, bajo los parámetros que venimos describiendo– y que van mucho más allá de un mero relato de los hechos vividos⁴⁷³. En una perspectiva temporal, hasta la publicación del primer volumen de las de Guerra

⁴⁷⁰ Junto con la ya destacada de, TUSELL, Javier, “Ni tan perverso, ni tan astuto”, *Babelia. Suplemento cultural de El País*, 3 de julio de 2004; AVILÉS, Juan, “Cuando el tiempo nos alcanza”, *El Cultural*, 3 de junio de 2004; BARRENETXEA, Igor, “Dejando atrás la oposición”, *Entelequia. Revista Interdisciplinar*, nº 2, (2006), pp. 303-304; MÚGICA, Enrique, “Sobre las memorias de Alfonso Guerra”, *Letra Internacional*, nº 83, (2004), pp. 79-82, también publicada en *Cuadernos de pensamiento político*, nº 4, (2004), pp. 209-212 de la Fundación FAES

⁴⁷¹ SEMPRÚN, Jorge, *Federico Sánchez se despide...*, *op.cit.*.

⁴⁷² TIERNO GALVÁN, Enrique, *Cabos sueltos*, Barcelona, Bruguera, 1982.

⁴⁷³ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*. De interés también fueron algunas de sus posteriores entrevistas concedidas: ALMUNIA, Joaquín, “Entrevista” en BURNS, Tom, *Conversaciones sobre...*, *op.cit.*; id., “Joaquín Almunia. El dedo en todas las llagas” en IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, pp. 147-193.

constituirían las memorias del más alto dirigente del socialismo y de sus gobiernos. De hecho, todavía hoy sigue siendo las únicas memorias de un Ministro de Trabajo, tanto socialista como no socialista.

Como ya hemos podido leer estamos aquí ante uno de los escasos materiales pensados también como soporte para el trabajo de los historiadores. Un detalle no menor. Asimismo, estas mismas *memorias* resultan de un enorme valor para analizar una vertiente frecuentemente ignorada en el resto de los dirigentes socialistas –si no es para la crítica y demolición de determinados personajes del sindicato socialista–; nos referimos a las relaciones entre Partido-Sindicato, y lo que es más importante a las diferentes sensibilidades dentro del ejecutivo socialista a las reivindicaciones del *movimiento obrero*. Igualmente viene a aportar una interesante visión –aunque escasas sean las páginas que se dedican– de cómo transcurrieron, precisamente, las negociaciones sobre la reforma del Estatuto de los Trabajadores y de forma más extensa en torno al Acuerdo Económico y Social.

Si el merito de las “memorias políticas” de Almunia residen en su nivel de concreción y aportación de datos históricos novedosos, aunque no se presente documentación personal; al mismo tiempo, el relato en sus ejes centrales vuelve a sustentar el paradigma del proyecto de modernización socialista⁴⁷⁴.

Otro caso significativo son las excelentes memorias de Julio Feo –*Aquellos años*⁴⁷⁵– y en menor medida las de Eduardo Sotillos –*1982*⁴⁷⁶–. Políticos todos ellos, junto a Roberto Dorado⁴⁷⁷, Francisco Fernández Marugán⁴⁷⁸, que constituyeron en su momento el *staff* del Gabinete de la Moncloa, y cuyas reflexiones y aportaciones dispersas constituyen materiales de primer orden para entender la marcha del socialismo –a nivel de Partido como a nivel de Gobierno– desde el año 82. La relevancia de la primera de las citadas radica en que permite acercarse a los *entresijos* y *estructuras* de poder del PSOE y del Palacio de la Moncloa como ninguna otra publicada hasta hoy. La reconstrucción minuciosa con que aborda en sus “memorias” Julio Feo –persona de confianza de Felipe González, con quien mantuvo un contacto cotidiano desde mediados de los setenta hasta 1987 –día por día, documento por documento– junto con la enumeración de hechos y de personajes claves en la historia de España– se nos termina presentado más al inusual modelo de diario para el caso español que a las típicas memorias⁴⁷⁹. A pesar de la aparente modestia con que pretenden presentarse, en donde el propio Feo aparece como mero relator de los hechos en donde fue protagonista, es tal la cantidad de información aportada, junto con su capacidad de síntesis y concreción, que junto con las ya citadas de Alfonso Guerra y Joaquín Almunia, se ha constituido en referencia obligada.

⁴⁷⁴ «La sociedad española cuenta con más recursos que nunca para hacer frente a los desafíos del nuevo siglo. Hemos culminado la transición a la democracia y superado el atraso histórico que arrastrábamos desde el siglo XIX. Las necesidades básicas de nuestros ciudadanos están ahora mucho mejor cubiertas que en ninguna otra época de nuestra historia». ALMUNIA, J., *Memorias políticas...*, *op.cit.*, p. 413.

⁴⁷⁵ FEO, Julio, *Aquellos años...*, *op.cit.*.

⁴⁷⁶ SOTILLOS, Eduardo, *1982...*, *op.cit.*.

⁴⁷⁷ Véase el Capítulo 5, *nota 22* y *nota 23*.

⁴⁷⁸ Véase lo apuntado en páginas anteriores.

⁴⁷⁹ «Y un último párrafo a modo de justificación, porque donde dije, digo Diego. Siempre había dicho que no escribiría ningún tipo de memorias. En la primavera de 1991, un amigo me prestó y me recomendó que leyera un libro, *The fringes of power* [...] El libro, en que no se revela nada excepcional es la transcripción de las anotaciones diarias que iba haciendo Colville de su trabajo [...] Tras leerlo, decidí ponerme a trabajar en estos recuerdos que ni si quiera quiero llamar memorias, que es palabra que suena a libro importante», FEO, Julio, *Aquellos años...*, *op.cit.*, p. 23.

Igualmente, las *memorias* de Eduardo Sotillos –Portavoz del Gobierno y conocido periodista– presenta en una correlación de lineal de los acontecimientos. En cualquier caso, he aquí otro ejemplo de “particular sinceridad” de los dirigentes socialistas al avisar de lo siguiente:

«Éste no es un libro de memorias. El autor tuvo un protagonismo muy escaso en el desarrollo de los acontecimientos que culminaron con la victoria socialista en las elecciones de octubre de 1982 [...]. Siento decepcionar al lector que espere encontrar en estas páginas otras revelaciones que no sean las que proporcionan la transcripción autorizada de conversaciones mantenidas con los hombres y mujeres, mayoritariamente políticos, que en 1982 competían por imponer su propio modelo a la hora de resolver los problemas de España»⁴⁸⁰.

Tras reconocer el propio Sotillos que no aporta documentación inédita –a pesar de anunciar que dispone de la misma al igual que planteaba también en su momento el propio Peces-Barba– termina remitiendo al igual que Almunia al futuro trabajo de los historiadores:

«Este libro pretende encontrar respuestas, como las busca un periodista, y con el máximo respeto hacia los historiadores profesionales. Pero también, como cualquier trabajo periodístico, dejará entrever las opiniones propias del autor»⁴⁸¹.

En cualquier caso, 1982 constituye uno de los ejemplos más perfilados de los cánones de la misión histórica del socialismo español. En concreto, su relato del contexto histórico del año 82 –sumado a la *idea-fuerza* de la “herencia recibida” – como momento fundacional de la *conquista del poder político*, contiene en sí mismo todos los ingredientes de heroísmo que, de forma tan inteligente, ha promocionado el socialismo para la posterior legitimación de sus actuaciones.

En lo que respecta al segundo bloque que antes estableciéramos, los tres ejemplos por antonomasia serían los casos de Francisco Bustelo, Pablo Castellano y Antonio Saavedra. Bustelo⁴⁸² y Castellano⁴⁸³, por su formación académica, su trayectoria política y su encuadramiento en el socialismo español a principios de los setenta, estuvieron llamados a encabezar el ideario socialista en plena reestructuración ideológica. La propia transformación del PSOE a lo largo de una década (1972-1982), a través de lo que comúnmente se ha denominado la renovación o la refundación del PSOE –tras la etapa de la radicalización posibilista del discurso político en plena salida de la dictadura– desplazaría a estos *cuadros* del socialismo de ocupar el que hubiera sido su “lugar natural”. De ahí que hayan de encuadrarse en este subapartado antes que en el de los “soportes intelectuales” del socialismo.

Desde el Congreso de Suresnes, pasando por los traumáticos XXXVIII Congreso y el extraordinario celebrado de 1979, a la configuración del proyecto de modernización socialista –con el XXIX Congreso del PSOE en 1981 y la elaboración del Programa Socialista para las elecciones de 1982 de por medio, que terminarían con cualquier ambigüedad de tipo ideológico– ambos políticos capitanearían, en la mayor parte de los casos, muchas de las luchas y debates por mantener la fisonomía clásica del PSOE –pablista y marxista–. Sus consecutivas derrotas –parciales o totales– en los periodos congresuales y en las mayorías establecidas en los órganos de gobierno partidista, les desalojarían de los centros de poder del socialismo español, a la hora de liderar en lo ideológico y en lo programático las estrategias

⁴⁸⁰ SOTILLOS, Eduardo, 1982..., *op.cit.*, pp. 13-14.

⁴⁸¹ *Ibíd.*

⁴⁸² BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*. Años más tarde, véase, *id.*, *La historia de España y el franquismo: un análisis histórico y económico y un testimonio personal*, Madrid, Síntesis, 2006.

⁴⁸³ CASTELLANO, Pablo, *Yo sí me...*, *op.cit.*. A partir de esta misma obra publicaría otras tantas con cada vez un mayor tono crítico en relación con el pasado reciente español y sus correspondientes lecturas: *id.*, *Por Dios, por la patria y el rey: una visión crítica de la transición española*, Madrid, Temas de Hoy, 2001; y una recopilación de sus artículos periodísticos: *id.*, *Gota a gota*, Madrid, EILEA, 1996.

para la conquista del poder político. Igualmente, la posterior deriva del PSOE situaría a los autores al poco tiempo fuera del PSOE para ingresar durante un tiempo corto en la otra *izquierda* –Izquierda Unida y el PASOC–.

Estamos ante similares biografías políticas que reflejan a la *disidencia* políticamente correcta del PSOE. Y decimos *políticamente correctas*, porque si exceptuamos las críticas a la falta de democracia interna del PSOE, las viscerales críticas a González y a Guerra principal aunque no únicamente, y a la resolución del citado XXVIII Congreso; el resto de las opiniones y reflexiones vertidas, en suma, no cuestionan la orientación principal de la historia institucional del socialismo. Precisamente, este tipo de críticas a su vez han servido como elemento probatorio para reforzar la “historia oficiosa” del PSOE, en tanto las mismas al ser integradas en dicho relato, han legitimado la propia orientación del discurso “oficialista”. En todo caso, estas referencias son obligadas para el estudio del socialismo español, ya que hasta el momento han constituido, a pesar de su desigual calidad, uno de los pocos relatos en lo que se puede rastrear aquellos hechos o acontecimientos, que vienen a apuntalar algunas claves centrales para explicar la configuración del socialismo a principios de la década de los ochenta.

Francisco Bustelo, no puede ser más específico en sus memorias –*La izquierda imperfecta*– cuando anuncia en sus primeras líneas: “En este libro no cuento nada nuevo sobre el acontecer político en España entre 1955 y 1995, pues sólo es un relato de una peripecia personal, acompañado de algunas reflexiones”⁴⁸⁴. Así pues, si exceptuamos los capítulos dedicados a narrar el ascenso de personajes como Boyer u otros relacionados con la elaboración del Programa Económico del PSOE⁴⁸⁵, junto con sus relaciones personales y políticas con Felipe González o con Alfonso Guerra⁴⁸⁶; estas memorias discurren entre los pormenores insignificantes en no pocos casos, y las anécdotas irrelevantes, que nada ayudan a reconstruir la historia del socialismo español. El caso de las memorias de Pablo Castellano –*Yo sí me acuerdo*– no sólo es notablemente superior en cuanto a estilo y “credibilidad”, sino que además trata de confrontar, en algunos aspectos, cuestiones básicas de la evolución de la estrategia socialista. Pero como en el caso anterior, la permanente autojustificación de su trayectoria en el interior del PSOE y de su posterior salida, responde más a un intento de explicación a *posteriori* de lo que fue y no pudo ser, que estrictamente a unas memorias políticas. De cualquier de las maneras, de interés resultaron en su momento la detallada selección de no pocos documentos de su archivo personal⁴⁸⁷, así como las duras críticas

⁴⁸⁴ BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, p. 9. El mismo más adelante reconoce: «No cuento ni un solo escándalo y ni un solo caso de corrupción, entre otras cosas porque jamás tuve conocimiento de ninguno. Tampoco narro acontecimientos políticos importantes sobre los que pudiera aportar alguna novedad. Nunca estuve en el secreto de los dioses y mi protagonismo, salvo cuando fui el principal contrincante de Felipe González en un sonado congreso del PSOE o el primer rector socialista desde la Segunda República, fue siempre bien modesto». *Ibidem*, p. 11.

⁴⁸⁵ Véase el capítulo IV, “Derrota y triunfo de un líder” en *ibidem*, pp. 93-126.

⁴⁸⁶ Un ejemplo clásico de las ‘voces discordantes’ a la hora de afrontar la historia del socialismo español, es la conocida intervención del propio Bustelo en el XXVIII Congreso del PSOE defendiendo la necesidad de que el PSOE se siguiera definiendo como marxista. Como puede apreciarse en los dos siguientes relatos, estas mismas *voces* se circunscriben más a elementos de percepción, que a críticas o un posible cuestionamiento de fondo sobre concretos acontecimientos históricos: «En un ambiente crispado defendí en el pleno la controvertida resolución y, todavía no sé muy bien, por qué obtuve en mi intervención, muy breve, pues no llegó a quince minutos, un gran éxito. Encendí los ánimos de mis correligionarios con un discurso improvisado que siento no recordar exactamente y que no sé si obrará en los archivos del PSOE....». BUSTELO, Francisco *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, p. 111; «Enfrente estuvo el Francisco Bustelo más burdo que nunca había oído. La mezcla de su oratoria en la que pervían expresiones bíblicas revueltas con recetas del marxismo vulgar, entusiasmó a los delegados, que votaron mayoritariamente por la propuesta de incluir de manera taxativa el carácter marxista del Partido». GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, *op.cit.*, p. 332.

⁴⁸⁷ Véase “apéndice Documental” en CASTELLANO, Pablo, *Yo sí me...*, *op.cit.*, pp. 435-445.

lanzadas contra lo que antes definiéramos como el grupo de notables o intelectuales del PSOE⁴⁸⁸.

Finalmente, *Secuestro del Socialismo* de Antón Saavedra⁴⁸⁹ es la otra cara de las memorias socialistas. A pesar de que vería la luz en una editorial menor –Manos Libres– y de la escasa o nula atención que recibiría por parte de la “crítica”, si exceptuamos en su región de origen –Asturias– el libro tendría un notable éxito de ventas. Ejemplo, de unas “memorias políticamente incorrectas”, *Secuestro del socialismo* es, sin lugar a dudas, el relato más duro que un dirigente del socialismo –afiliado del PSOE desde 1974, Secretario General de la Federación Estatal de Mineros de la UGT, diputado autonómico en Asturias, y posteriormente, por Izquierda Unida– haya publicado sobre el socialismo español del último tercio del siglo XX. Al igual que ha sucedido con otras obras similares⁴⁹⁰, el libro de *memorias* de Saavedra, tanto por su tono crítico como por la documentación conocida e inédita que se aporta, ofrece un relato raramente narrado, y que nos conduce a lo que podríamos denominar como la “historia oculta del PSOE”. Desde los apoyos recibidos por parte de la CIA⁴⁹¹, pasando por sus contactos y amistades con los poderes fácticos españoles e internacionales –CEOE, FMI, Banco Mundial...– y los servicios secretos españoles –franquistas o pre-democráticos– hasta sus relaciones con la Internacional Sionista –vía Enrique Múgica⁴⁹²– nos configuran una historia que a tener de los nuevos datos aportados –transcripción de conversaciones telefónicas, cartas, documentación interna del PSOE y de la UGT...– dista en mucho de lo conocido hasta el momento, al menos, desde una perspectiva histórica. Si a ello le sumamos la descripción detallada en no pocos capítulos del libro de las redes personales y familiares dentro del PSOE, y su influencia en la toma de decisiones centrales, *Secuestro del Socialismo* por sí mismo constituye un relato que debe de tenerse en cuenta. Más teniendo presente que no ha surgido respuesta desde su publicación al mismo.

El problema deviene en el momento en que esta *historia oculta*, narrada en no pocos pasajes como una “gran conspiración” estratégicamente urdida, confronta de tal modo con lo conocido hasta ahora. Cualquier intento de tomar por válidas las tesis de Saavedra nos conducen no sólo a un replanteamiento en profundidad de la historia, hasta ahora, conocida del PSOE, sino a la apertura de todo un nuevo conjunto de hipótesis con las que investigar este periodo. He aquí el gran problema de las mismas: el atractivo de estas *memorias*, o bien,

⁴⁸⁸ «Ya en Suresnes había iniciado el Sr. González la táctica según la cual, a mayor distanciamiento de la base, mayor oligarquización, mayor secretismo, más para ‘tener las manos libres’ y no despertar reacciones había que presentar como coartada, frente al pragmatismo que se le achacaba, una Ejecutiva adornada con los llamados ideológicos, y a ser posible con gentes de difundida imagen de teóricos marxistas rigurosos, o avalada por éstos. Tras Bustelo vino Gómez Llorente, luego se añadirían a la lista de cobertores o edredones Maravall, Sotelo, Tezanos, Paramio, Escudero y Claudín, para culminar con el dúo Quintanilla-Vargas Machuca. Sotelo ha sido el único de la última época capaz no sólo de mantener su independencia de criterio, sino de denunciar la permanente mistificación». *Ibídem*, p. 320.

⁴⁸⁹ SAAVEDRA, Antón, *Secuestro del socialismo*, Madrid, Manos Libres, 2004.

⁴⁹⁰ Véase por ejemplo GRIMALDOS, Alfredo, *La CIA en España: Espionaje, intrigas y políticas al servicio de Washington*, Madrid, Debate, 2006.

⁴⁹¹ De interés es su relato de los *entresijos* del XXVIII Congreso del PSOE, y las presiones de determinadas fundaciones y servicios secretos extranjeros: “Adiós al marxismo” (pp. 49-60). O el propio relato de las formas de financiación irregular del PSOE en “Con Flick, con Flock y la CIA” (pp. 61-70).

⁴⁹² Al respecto del triunfo socialista de 1982 como momento fundacional del proyecto de modernización socialista, el propio autor planteaba: «Los 10.127.392 votos recolectados por las candidaturas socialistas el 28 de octubre de 1982 representaban el mayor respaldo popular jamás otorgado en nuestro país a un gobernante por medios democráticos: Felipe González, el hombre recomendado por la Internacional Sionista con el visto bueno de las multinacionales, tras el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York. De esta manera, el nuevo orden mundial planificado por la alta finanza internacional veía acelerada su aplicación en España». *Ibídem*, p. 93.

pueden conducir a aportar nuevos argumentos para explicar los porqués y objetivos de la transformación del socialismo español como su posterior actividad legislativa; o por el contrario, sumergirnos en un escenario de dudas e incertidumbres, que sin la necesaria documentación y testimonios personales, termine por adentrarnos en asuntos menores. En todo caso, lejos está de la “irrelevancia” de otras memorias citadas.

Y volvemos, nuevamente, a recurrir a Javier Tusell:

«Lo que, de cualquier modo, parece evidente es la manifiesta superioridad de Felipe González, fácilmente admisible por todos los que colaboraron en sus Gobiernos, pero cada vez más transparente a medida que se amplía la distancia histórica y se pretende un juicio con voluntad de imparcialidad [...]. Lo que parece evidente y notorio es la grandeza y la excepcionalidad de un político que supo hacer compatible el idealismo y el pragmatismo, el deseo de cambio y el modo moderado de llevarlo a cabo»⁴⁹³.

Así pues, si antes examinamos lo aportado en torno a las ciencias políticas sobre el liderazgo y las élites políticas, desde el periodismo la obsesión compulsiva cuando no enferma por el “felipismo”, corresponde ahora detenerse brevemente en el conjunto de biografías –en su mayor parte no autorizadas– en torno a Felipe González⁴⁹⁴ y Alfonso Guerra⁴⁹⁵. Por cierto, ninguna de ellas escritas por un historiador.

Cabezas visibles del socialismo español durante un cuarto de siglo, se han convertido en la “pareja” de políticos –con el correspondiente reparto de *papeles* políticos, figurativos y metafóricos⁴⁹⁶– que mayor atención han recabado en nuestra historia reciente. Si el “espíritu del 82” resulta necesario para explicar las dimensiones del proyecto socialista de modernizador, tanto o más lo es la capacidad evocadora y mediatizadora que ostentaron Felipe González, y en menor medida Alfonso Guerra, para explicar e interpretar las dimensiones históricas de la época socialista. Un liderazgo tanto político como histórico compartido hasta los noventa, que no ha vuelto a tener paragón.

Aunque el balance cuantitativo es claramente favorable de quien fuera presidente del Gobierno –de quien se han hecho retratos psicológicos hasta cartas astrales ex-proceso,

⁴⁹³ TUSELL, Javier, “Prólogo. La época socialista entra en la Historia” en IGLESIAS, M^a Antonio, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 26.

⁴⁹⁴ Por orden cronológico y sin ánimo de exhaustividad: AGUILAR, Miguel Ángel y CHAMORRO, Eduardo, *Felipe González. Perfil humano y político*, Madrid, Cambio 16, 1977; CHAMORRO, Eduardo, *Felipe González: un hombre a la espera*, Barcelona, Planeta, 1980, con prólogo del propio Felipe González; CALVO HERNANDO, Pedro, *Todos me dicen Felipe*, Barcelona, Plaza & Janés, 1987; FUENTE, Ismael, *El caballero cansado: el largo adiós de Felipe González*, Madrid, Temas de Hoy, 1991; GUTIÉRREZ, José Luis y MIGUEL, Amando de, *La ambición del César: un retraso político y humano de Felipe González*, Madrid, Temas de Hoy 1993; CERNUDA, Pilar, *El presidente*, Madrid, Temas de Hoy, 1994; JÁUREGUI, Fernando y MENÉNDEZ, Manuel Ángel, *El hombre que pudo ser Felipe González. Pasión y muerte de Antonio Amat y de otros ‘malditos’ del PSOE*, Madrid, Temas de Hoy, 1994; PREGO, Victoria, *Felipe González: el presidente del cambio (1982-1996)*, Madrid, Unidad, 2002. E igualmente consúltese: GONZÁLEZ, Felipe, *Un estilo ético: conversaciones con Víctor Márquez Reviriego*, Barcelona, Argos Vergara, 1982, y el volumen de la colección de biografías cruzadas, en este caso firmadas por SÁNCHEZ CERVELLO, Josep y TABAY, Iván, *Felipe González*, Barcelona, Ediciones B, 2004.

⁴⁹⁵ RICO, Eduardo G., *Alfonso Guerra*, Barcelona, ASES, 1989; GUERRA, Antonio, *Alfonso Guerra. La divertida biografía de un sultán destronado*, 3^a ed., Madrid, Temas de Hoy, 1991; MIRALLES, Melchor y SATÚE, Francisco J., *Alfonso Guerra: el conspirador*, 2^a ed., Madrid, Temas de Hoy, 1991. Biografías a las que habría que añadir el libro de, FERNÁNDEZ-BRASO, Miguel, *Conversaciones con Alfonso Guerra*, Barcelona, Planeta, 1983.

⁴⁹⁶ RIVERO, Jorge M^a, *El insólito matrimonio político entre Felipe González y Alfonso Guerra: teorías e historia inéditas de la bicefalia política en España*, Valladolid, Ediciones de Cámara, 1984.

además de compararlo con la propia Marilyn Monroe⁴⁹⁷ – lo publicado hasta el momento tiene en común dos notas características: primero, ninguna de las biografías publicadas ha sido fruto de labor historiográfica⁴⁹⁸; en segundo lugar se ha de destacar, una vez más, como en este terreno la dicotomía, y la ausencia de objetividad a la hora de trazar dicha trayectoria personal y política, se han convertido en las señas de identidad de este conjunto de obras. Así pues, se ha tendido a retratar más al personaje público con todos sus tópicos, que a la persona humana o propiamente al político.

Resulta indicativo, además, que ninguna de las numerosas obras publicadas puedan considerarse una referencia obligada para el estudio de estos personajes históricos. Un ejemplo de lo que aquí estamos tratando son dos de las biografías publicadas en torno a Felipe González en estos últimos años: por un lado, estaría el texto de José García Abad –*Las mil caras de Felipe González*⁴⁹⁹– en donde a la redundancia de tópicos –cuando no de “chascarrillos” carentes de todo interés– en torno al mandatario socialista, sin aportar ningún tipo de documentación inédita o de información relevante –más allá de sesenta entrevistas que poco o nada aportan de nuevo– persigue objetivos más cercanos a la “glorificación del personaje”, que a ofrecer una imagen ajustada a los hechos históricos, a pesar de la objetividad pregonada por el propio autor. El otro caso, sin duda significativo, es la biografía de Alfonso S. Palomares –*Felipe González. El hombre y el político*⁵⁰⁰– libro también de gran éxito editorial, que desde la cercanía y amistad del autor al biografiado –recuérdese que sería uno de los pocos “militantes” socialistas que próximos a las tesis felipistas del XXXVIII Congreso, llegaría a publicar, inclusive, un libro al respecto⁵⁰¹– destaca, al contrario del anterior, no tanto por una “exaltación” de la figura de Felipe González –perceptible en no pocos pasajes– sino por una justificación a posteriori de su trayectoria política; en donde los errores de la gestión socialista son minimizados y los aciertos exaltados hasta límites algunas veces impensables. Es decir, estaríamos cercanos a una biografía “seudo-oficial”. Así este libro resulta, en muchas partes del mismo, más una crónica oficial de los gobiernos socialistas, que fruto de cualquier reflexión crítica y menos autocrítica. Tampoco es baladí el momento editorial en que este libro es publicado, es decir, poco después de las memorias de Alfonso Guerra, y en donde en más de una ocasión se produce una revisión y/ contestación – no explícita– de las mismas en tono crítico⁵⁰².

En comparación con el propio Guerra y González, el resto de dirigentes socialistas – tanto del PSOE como de la UGT, es decir, la *familia socialista*– ha quedado bastante desdibujado. Ello a excepción del caso de Nicolás Redondo, que dentro de este singular género literario representaría tanto la “conciencia socialista” como la “voz crítica” del socialismo español. Es del todo revelador, además, cuando se observa la biografía y

⁴⁹⁷ GONZÁLEZ DURO, Enrique, *Biografía psicológica de Felipe González*, Madrid, Temas de Hoy, 1996; WAXKOWSKY, Geraldyn, *Felipe González ante el umbral de la era de Acuario: una interpretación psicológica-astrológica de su vida y misión*, Madrid, Altalena, 1983; y, ARMAS MARCELO, Juan José, *Los años en..., op.cit.*

⁴⁹⁸ Uno de las escasas biografías de dirigentes socialistas de la década de los ochenta realizadas por historiadores hasta la fecha en, DELGADO, Santiago y SÁNCHEZ MILLAS, M^a del Pilar, *Francisco Fernández Ordóñez: un político para la España necesaria: 1930-1992*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.

⁴⁹⁹ GARCÍA ABAD, José, *Las mil caras de Felipe González*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2006.

⁵⁰⁰ PALOMARES, Alfonso F., *Felipe González. El hombre y el político*, 3^a ed., Barcelona, Ediciones B, 2005.

⁵⁰¹ Id., *El Socialismo y..., op.cit.*

⁵⁰² «Alfonso [Guerra] ha escrito un brillante guión verbal sobre su desapego del poder y su ausencia de ambiciones terrenales, pero ese guión nunca lo ha representado en su vida real. Tal vez por eso admiro su talento creador y su capacidad para hacer una traslación de personalidad. Ser uno y reflejar otro en el espejo mediante juegos verbales». PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González..., op.cit.*, p. 250.

trayectoria política, de quien fuera durante muchos años Secretario General de la UGT, la visión no tanto amable como exaltada que se ha realizado del mismo. De esta forma, se ha entendido a leer su biografía más en función de su protagonismo en la ruptura de la familia socialista en 1988, que en relación a su papel de “correa de transmisión” de los ejecutivos socialistas durante la primera legislatura así como su apoyo fundamental en la puesta en marcha del proyecto de modernización socialista. No sólo es que se haya obviado –como tiempo tendremos de ver en nuestro estudio de caso– su papel clave en la ruptura de cualquier proceso de unidad de acción sindical, sino su decidido rol en la marginación y exclusión de Comisiones Obreras, por no detenernos en sus enfrentamientos con el propio Marcelino Camacho. Otro tanto se podía decir, del intento de sobredimensionar su papel en la lucha contra la dictadura.

Estas claves interpretativas han tenido su reflejo en los libros de entrevistas pero sobre todo en las biografías escritas. Desde la obra de Mariano Guindal y Rodolfo Serrano –*La otra transición*⁵⁰³– pasando por la biografía de Jorge Pérez Reverte –*Nicolás Redondo: memoria política*⁵⁰⁴– hasta la entrevista de corte biográfico que llevaría a cabo el propio Antonio García Santesmases –*Historia, memoria y futuro*⁵⁰⁵– confirman estos ángulos de visión. Especialmente llamativo es este último caso. García Santesmases, desde la cercanía pero sobre todo con la amistad con Redondo, termina dibujando antes que a un dirigente sindical a un intelectual con amplios conocimientos de los “clásicos” del socialismo. Y, pese a este intento de redibujar intelectualmente a Redondo, sin embargo, cuando uno se detiene en las propias respuestas que va ofreciendo en torno a su protagonismo en acontecimientos claves, lo que termina sobresaliendo es el “clásico automatismo” de los políticos consumados ante interrogantes centrales, de cara a una permanente justificación de decisiones tomadas, y en donde no hay rasgo alguno de errores, críticas o cuando menos replanteamiento de posiciones.

Por lo demás, escasas son las biografías de otros altos dirigentes socialistas. Exceptuando las dos centradas en Joaquín Almunia –la de Ricardo Martín, *Almunia: un corredor de fondo*⁵⁰⁶ y la de Mariló Suárez, *Los secretos de Almunia*⁵⁰⁷– de muy desigual calidad, aunque aportan no poca información de alcance; se cuenta, por lo demás, con el interesante trabajo de José Luis Gutiérrez sobre Miguel Boyer⁵⁰⁸ o el también logrado acercamiento de Carmen Tomás e Ignacio Alonso a Carlos Solchaga⁵⁰⁹, y más recientemente la biografía edulcorada en todos sus extremos sobre Manuel Chaves de Francisco Rosell⁵¹⁰. A

⁵⁰³ GUINDAL, Mariano y SERRANO, Rodolfo, *La otra transición: Nicolás Redondo. El sindicalismo socialista*, Madrid, Unión, 1986. Véase aquí también: ARIJA, José Manuel, *Nicolás Redondo*, Madrid, Cambio 16, 1977.

⁵⁰⁴ MARTÍNEZ REVERTE, Jorge, *Nicolás Redondo: memoria política*, Madrid, Temas de Hoy, 2008.

⁵⁰⁵ GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y futuro: Nicolás Redondo (1977-2007)*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007.

⁵⁰⁶ MARTÍN, Ricardo, *Almunia: un corredor de fondo*, Madrid, Temas de Hoy, 1998.

⁵⁰⁷ SUÁREZ, Mariló, *Los secretos de Almunia*, Barcelona, Alba Editorial, 1998, con prólogo de Javier Solana. Igualmente véase, RICA, Sara de la, “Joaquín Almunia” en FEDEA, *25 Años de economía española. Testigos*, Madrid, FEDEA, 2011.

⁵⁰⁸ GUTIÉRREZ, José Luis, *Miguel Boyer, el hombre que sabía demasiado*, 2ª ed., Madrid, Temas de Hoy, 1992.

⁵⁰⁹ TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador: Carlos Solchaga: de la reconversión industrial a la crisis económica y social*, Madrid, Temas de Hoy, 1992. Véase también, MOTA, Jesús, “Entrevista con Carlos Solchaga” en JULIÁ, Santos, PRADERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la transición*, Madrid, Taurus, 1996, pp. 564-568.

⁵¹⁰ ROSELL, Francisco, *El bueno de Manolo: biografía no autorizada de Manuel Chaves, el último superviviente del clan de la tortilla*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009.

diferencia de las memorias, los libros aquí citados destacan, más allá de sus claras orientaciones políticas así como su cercanía o rechazo al protagonista de turno, por su notable interés desde la perspectiva histórica.

De cara a concluir este repaso por el estado de la cuestión, nos detendremos en los libros de entrevistas firmados por Tom Burns –*Conversaciones sobre el socialismo*⁵¹¹– y especialmente el de María Antonio Iglesias –*La memoria recuperada*⁵¹²– entre otros⁵¹³. En los mismos fueron entrevistados los principales responsables políticos del PSOE y de los gobiernos socialistas, a los que sumaron en el caso del libro de Burns las opiniones de destacados “intelectuales” cercanos al PSOE e incluidos historiadores como Santos Juliá.

Publicados en 1996 y 2003 respectivamente, en plena “travesía por el desierto” del socialismo, abordan desde dos perspectivas –la ensayística y la periodística– de forma inteligente todos aquellos temas que dentro de la acción de los gobiernos socialistas, habían pasado a constituir los parámetros esenciales del mismo *imaginario colectivo socialista*. Aunque el primero de ellos no alcanzaría la notoriedad del segundo, es de agradecer, desde una perspectiva historiográfica, la formulación de unos cuestionarios semi-estructurados no tanto con vistas a resaltar aquellos problemas menores o menos significativos, en los que ampliamente se detiene el libro de María Antonia Iglesias, como a analizar la herencia socialista y su significado para la historia española. Aunque la sinceridad y credibilidad, al igual que sucede con las memorias, son en sí mismo elementos subjetivos difíciles de medir y evaluar, los testimonios ofrecidos en ambas obras nos conducen, en suma, a uno de los mejores retratos de aquella generación única de socialistas. En suma, resultan imprescindibles para llevar a cabo un examen histórico de este tiempo. Libros, además, que no han tenido su correspondiente correlato con otras organizaciones políticas y sindicales de la izquierda del país.

2.2.11. La historiografía académica y profesional: una *agenda investigadora* prácticamente por inaugurar

Llegados a esta parte cuanto menos se pueden constatar tres grandes realidades en torno al socialismo español, y más concretamente acerca de los gobiernos socialistas. Primero, desde la economía, pasando por la sociología hasta las ciencias políticas, la bibliografía existente sobre las más diversas cuestiones es más que considerable. Incluso, nos atreveríamos a señalar, que es *inabarcable* cuando se profundiza en determinadas cuestiones. Ahora bien, de la misma forma cabría señalar que han predominado los enfoques especializados en cada área del conocimiento. Así pues, y en tercer lugar, la ausencia de enfoques interdisciplinares o que hayan pretendido ir más allá de los límites de cada disciplina, ha conllevado a parcelar el conocimiento del socialismo. Se carece, en términos generales, de una visión global sobre el periodo. De tal forma, que abordar dicha etapa histórica a partir de las anteriores referencias –desde las herramientas propias del historiador– requiere una amplia labor de selección de trabajos y ante todo de depuración de datos y evidencias.

⁵¹¹ BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.* .

⁵¹² IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada. Lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes socialistas de sus años de Gobierno*, Madrid, Aguilar, 2003. Véanse al respecto las positivas reseñas del libro: JULIA, Santos, “Tal como fueron”, *Babelia. Suplemento Cultural de El País*, 20 de septiembre de 2003; o, BLANCO, Rogelio, “La memoria recuperada”, *El Cultural*, 23 de octubre de 2003.

⁵¹³ PAPELL, Antonio, *Conversaciones con Luis Yáñez*, Barcelona, Plaza & Janés, 1991, con prólogo de Felipe González; FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Francisco, *Palabras en libertad [conversaciones con Eduardo G. Rico]*, Barcelona, Argos de Vergara, 1982; GONZÁLEZ, Felipe, *Un estilo ético...*, *op.cit.*; FERNÁNDEZ-BRASO, Miguel, *Conversaciones con Alfonso...*, *op.cit.*; MORÁN, Fernando y VIDAL, Juan Carlos, *Luz al fondo del túnel. Fernando Morán en diálogo con Juan Carlos Vidal*, Madrid, Alianza, 1999.

A lo anterior debe añadirse otra cuestión no menor. La bibliografía descrita, tanto la procedente del campo historiográfico como desde otras ciencias, se ha caracterizado por la ausencia ya no sólo de una visión de género, sino también por la propia ausencia de mujeres que hayan investigado sobre esta época.

Dicho esto, el balance a nivel estrictamente historiográfico sobre los gobiernos socialistas, y todavía en menor medida sobre el conjunto del socialismo –en concreto en torno al PSOE y la UGT– durante la década de los ochenta y noventa del siglo XX, es todavía enormemente limitado. Un repaso por lo publicado en estas últimas décadas así lo certifica. Tan sólo en estos últimos diez años comienza, y de forma lenta y no continuada, a publicarse en torno a aspectos concretos. Todo ello con un claro predominio de una historia política, de carácter general, y en donde la perspectiva social, simplemente, no aparece. Resulta también significativo también como la mayor parte de estos estudios han llegado de las manos de dossier monográficos en revistas especializadas cuando no directamente en forma de manual.

¿Por qué esta falta de atractivo en relación al estudio de los gobiernos socialistas? Cuando se retrocede en el tiempo antes del año 1982, se puede comprobar la existencia de un corpus bibliográfico amplio e incluso consolidado sobre la propia historia del PSOE. Ahí está una de las obras maestras de Santos Juliá, *Los socialistas en la política española, 1879-1982*⁵¹⁴. Un libro bien escrito, bien estructurado, con trabajo de fuentes y redactado con una enorme inteligencia, que pese a lo que pudiera pensarse no está exento de duras críticas contra el proceder de los socialistas, desde su salida de la clandestinidad hasta la conquista del poder político. Como se podría citar las obras de Abdón Mateos. *El PSOE contra Franco* o el V volumen sobre la historia de la UGT –*Historia de UGT: contra la dictadura franquista, 1939-1975*–⁵¹⁵. Y asimismo también debería reseñarse obras como la publicación de la tesis doctoral de Pilar Ortuño Anaya –*Los socialistas europeos y la transición española (1959-1977)*–⁵¹⁶ así como el interesante y documentadísimo trabajo de José María Marín Arce, *Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición, 1976-1982*, como uno de los escasos ejemplos –todavía hoy– de historiografía sobre el movimiento obrero y sindical durante los años previos a la llegada del PSOE al Gobierno⁵¹⁷. Por último, se tiene que anotar la reciente publicación de la tesis doctoral de Juan Antonio Andrade, que titulada *El PCE y el PSOE en (la) transición*, constituye el más serio intento de estudio comparado entre las dos organizaciones hegemónicas de la izquierda política⁵¹⁸. Un aspecto ciertamente poco atendido hasta el momento a pesar de su enorme trascendencia⁵¹⁹.

⁵¹⁴ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, op.cit.. Y también, id., *La desavenencia. Partidos, Sindicatos y Huelga General*, Madrid, Aguilar, 1989; y, id., “Sindicatos y poder político en España”, *Sistema*, nº 97, (1990), pp. 41-62.

⁵¹⁵ MATEOS, Abdón, *El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español (1953-1974)*, Madrid, Pablo Iglesias, 1993; id., *Historia de la UGT: contra la dictadura franquista, 1939-1975*, Madrid, Siglo XXI, 2008, vol. V.

⁵¹⁶ ORTUÑO ANAYA, Pilar, *Los socialistas europeos y la transición española (1959-1977)*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2005. En este sentido, consúltase también la línea de investigación de, MUÑOZ SÁNCHEZ, Antonio, “La Fundación Ebert y el socialismo español de la dictadura a la democracia”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 29, (2007), pp. 257-278.

⁵¹⁷ MARÍN ARCE, José M^a, *Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición, 1976-1982*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1997; id., “Condicionantes económicos y sociales de la transición” en MOLINERO, Carme (ed.), *La Transición, treinta años después*, Barcelona, Península, 2006, pp. 85-99.

⁵¹⁸ ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, *El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político*, Madrid, Siglo XXI, 2012.

⁵¹⁹ Al respecto nos remitimos, primero, a HEYWOOD, Paul, “Mirror-images: The PCE and PSOE in the Transition to Democracy in Spain”, *West European Politics*, vol. X, nº 2, (1987), pp. 193-210; y, GÁLVEZ BIESCA, Sergio y MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “Historia de una colaboración y competición política durante el franquismo: las relaciones del PCE-PSOE (1944-1974)” en BUENO

Parecía, pues, que existiera una barrera cronológica de carácter aparentemente psicológico difícil de atravesar por los historiadores, a partir de fechas mencionadas. Decimos psicológica, como podríamos decir de tipo profesional ante la más que fundada sospecha –tras tantos años investigando y recopilando opiniones de consagrados profesionales– de que el socialismo pero sobre todo la gestión de los gobiernos socialistas, sigue constituyendo un asunto *espinoso*, o, si se prefiere, *delicado*. En la *Presentación* citábamos a Javier Tusell cuando hablaba de cómo todavía “el período de Gobiernos socialistas sigue siendo materia de debate político”⁵²⁰. Es cierto, sigue resultando incomodo. A completar esta visión, Álvaro Soto Carmona señalaría lo siguiente: «La mayor dificultad con la que nos enfrentamos los historiadores a la hora de analizar dicha época es precisamente saber ponderar adecuadamente los hechos, para poder así obtener una imagen del período que responda a lo sucedido»⁵²¹. Así pues, junto con la supuesta falta de distancia temporal, influiría la más que presente memoria colectiva compartida. He aquí una de las explicaciones que han desanimado, en más de una ocasión, la puesta en práctica de una historia del presente.

Ahora bien, nos interrogamos, ¿no responde lo anterior a determinadas percepciones *subjetivas* antes que *objetivas*? Y puestos a preguntarnos: ¿lo anterior no tendría que ver con ciertas *comodidades corporativas* de las que hablara Jean Chesneaux⁵²²? No es descartable. ¿Hasta cuándo se mantendrá esta situación? ¿Qué tendrá que suceder para romper de una vez por todas con estas inercias e incorporar la “época socialista” dentro de la *agenda investigadora*? Y puestos a plantear hipótesis: ¿vendrá alguna monografía a desatascar estas resistencias visibles y no visibles? Lo cierto, es que cuando se visualizan los caminos por los que han transcurrido los intereses de la academia, se observa –más allá de determinadas modas rápidamente desaparecidas– como la incorporación de nuevas temáticas ha llevado lentos y no fáciles procesos de asimilación⁵²³.

El peso de la cuestión generacional y del hecho de haber vivido aquella época parecen determinantes. Lo que nos llevaría –visto lo visto– a pensar –también a modo de sugerente hipótesis– que, a buen seguro, deberán ser las nuevas generaciones de investigadoras –que lógicamente no hubieran vivido de forma tan directa tal periodo– las encargadas de romper con las inercias antes apuntadas. ¿Tiene que ser así? No, claro está. Tan sólo hace falta aproximarse a los estudios sobre la represión franquista, o, en términos generales sobre el citado régimen dictatorial.

Todavía más se hace patente tal realidad cuando se reflexiona y se observan las líneas de investigación, que se promocionan en los propios departamentos de historia contemporánea, que no invitan, en modo alguno, a indagar por estos terrenos. Y ni mucho menos a nadar a *contracorriente* no sólo por el enfoque y la metodología por la que se opte, sino por algo más sencillo y evidente a la vez: la problemática de adentrarse en terrenos poco fértiles para la promoción académica y curricular. Ejemplo de ello, la inexistencia de tesis doctorales en departamentos de historia contemporánea sobre este tiempo histórico⁵²⁴.

LLUCH, Manuel, HINOJOSA, José y GARCÍA GARCÍA, Carmen (eds.), *Historia del PCE: I Congreso, 1920-1977*, II vols., Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007, vol. II, pp. 45-58.

⁵²⁰ TUSELL, Javier, “Prólogo. La época socialista entra en la Historia” en IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 21.

⁵²¹ SOTO CARMONA, Álvaro, “Introducción” en id. (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, p. 12.

⁵²² CHESNEAUX, Jean, *¿Hacemos tabla rasa...*, *op.cit.*.

⁵²³ Véase, de nuevo, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*. Y asimismo el estudio de caso de, MARÍN GELABERT, Miquel Àngel, *Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-1975. La historia local al servicio de la patria*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» / Presas Universitarias de Zaragoza, 2004.

⁵²⁴ Una excepción –y parcial en todo caso– sería la tesis doctoral de, RODRÍGUEZ LÓPEZ, Emmanuel, *Autonomía y capital. Recomposición y crisis de la clase obrera como sujeto político*. Madrid, Barcelona, Euskadi, Asturias (1956-1986), Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2002. .

A todos estos factores se suma otro. No menos determinante. Es quizás también el más obvio. Ya hemos hablado de la crisis académica-institucional –además de política– en torno a la historiografía sobre el movimiento obrero y la clase obrera. Esto no significa, vaya por delante, que en los últimos años no se haya escrito sobre tales cuestiones como examinaremos en el siguiente apartado. De hecho, en estos últimos años se han publicado interesantes estudios –por ejemplo, *El puerto del acero*⁵²⁵ o *El pueblo en la calle*⁵²⁶– que han abordado cuestiones de claro interés de una posible historiografía social a la par que local –lo que no significa, en ningún caso, que al respecto no se haya publicado ningún otro trabajo desde el campo histórico⁵²⁷– al examinar los efectos de la reconversión industrial; y, sin embargo, o bien, han sido realizados por economistas o bien por antropólogos, cuando no por sociólogos como ya observamos⁵²⁸. Todo un síntoma de las inercias aquí descritas.

Pero volviendo a la crisis de la historiografía obrera, esta, a su vez, ha tenido su correspondiente traslación a la historia del socialismo. Al respecto, una vez más, las reflexiones de Luis Martín del año 2004, pueden ayudarnos a entender parte de la situación descrita. El título que empleó el citado autor para definir la evolución y el interés por la historia del socialismo en la última década resultó revelador: «De estrella rutilante a secundario ilustre». Un texto en donde llegaría a afirmar:

«[L]a historia del socialismo –como la del movimiento obrero– debería seguir reclamando la atención de los historiadores por cuando ni está todo dicho –cada generación, además, interroga al pasado de diferente forma y obliga a repensar la historia–ni todo está ya investigado»⁵²⁹.

Así pues, del *big bang* de principios de los años ochenta –aunque no pocas matizaciones se podrían añadir al respecto– a lo acaecido durante los noventa y la presente década, lo que se ha producido ha sido una caída en el vacío de la que hasta el momento no se ha comenzado a salir. Y es que la historia del socialismo, y por ende del movimiento obrero, siempre ha estado en paralelo, en nuestro caso, a las propias circunstancias políticas del país.

Ya en el terreno de cuestiones más concretas, habría que añadir otra aparente dificultad. Esta sería la siguiente: los obstáculos inherentes a la hora de determinar con precisión las que serían las propias tareas políticas del Partido y por otro del Gobierno. De hecho, llegaría a existir tales puntos de interconexión entre Partido-Gobierno e inclusive con el sindicato socialista –UGT– dentro de lo que se ha definido la *estrategia socialdemócrata del poder*, que resulta, a todas, luces complicado establecer, en algunos casos, y hasta muy avanzada la década de los ochenta, una división exacta de las diferentes esferas de la estrategia socialista. En cualquier caso, parece una “dificultad” menor si la comparamos con los esfuerzos que han conllevado también los recientes estudios sobre la represión franquista, en términos teóricos y metodológicos. Otros tantos casos se podían también citar.

No se trata aquí de volver a hablar de determinados *desiertos* y *secanos*, por más que resulten atractivas dichas expresiones, al menos, en términos metafóricos⁵³⁰. En verdad, poco a

⁵²⁵ SÁEZ GARCÍA, Miguel Ángel y DÍAZ MORLÁN, Pablo, *El puerto del acero: historia de la siderurgia de Sagunto (1900-1984)*, Madrid, Marcial Pons, 2009.

⁵²⁶ FLORIDO DEL CORRAL, David, GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis y ROCA MARTÍNEZ, Beltrán, *El pueblo en la calle: reconversión naval, sindicalismo y protesta popular en el astillero de Puerto Real*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009.

⁵²⁷ De cara a no extender más este estado de la cuestión, volvemos sobre dicho aspecto en, “3. A vueltas con la historia social: debates, controversias y dilemas del historiador social hoy en España”.

⁵²⁸ Véase lo apuntado en la *nota 123*.

⁵²⁹ LUIS MARTÍN, Francisco de, “«De estrella rutilante a secundario ilustre» o de la historiografía reciente sobre el socialismo en España” en FORCADELL, Carlos (ed.), *A los 125...*, op.cit., p. 287.

⁵³⁰ FORCADELL, Carlos, “Sobre desiertos y secanos: Los movimientos sociales en la historiografía española”, *Historia Contemporánea*, nº 7, (1992), pp. 101-116.

poco, y de forma bastante menos perceptible a nivel historiográfico de lo que se puede pensar en un primer momento, se van superando las inercias aquí apuntadas. Antes de entrar estrictamente en el propio estado de la cuestión, resulta de interés detenerse a analizar pormenorizadamente el conjunto de comunicaciones que se presentarían en el *Congreso Internacional. Historia de la época Socialista. España: 1982-1996*⁵³¹ –celebrado en Madrid en noviembre de 2011– pues las mismas nos aportan lo que hoy es buena parte de la realidad investigadora sobre este periodo histórico. En todo caso, vaya por delante, que la propia organización y celebración del citado Congreso indica que algo se comienza a mover. O cuando menos, el mismo ha ayudado a romper con ciertas barreras psicológicas también ya descritas.

Sus dos directores –Álvaro Soto Carmona y Abdón Mateos– han sido dos de los historiadores que mayor atención y tiempo han dedicado a la “época socialista”. Sin embargo, y como también ya se ha dejado sentado, los trabajos de los mismos se han movido en línea con una historia que definiéramos como “amable” en torno a la época socialista. Lo que no es óbice, en todo caso, para restarles importancia alguna a sus contribuciones. Ahora bien, este último aspecto reseñado tendría su correspondiente traslación a las propias ponencias del Congreso. Cuando se comprueba los propios ponentes que compondrían los diferentes paneles –*Influencias de otros socialismos en el PSOE*⁵³², *Historia política y sistema de partidos*⁵³³, *Relaciones exteriores*⁵³⁴, *Memoria e historia*⁵³⁵, *Los no socialistas*⁵³⁶, *Economía y sociedad*⁵³⁷, *Organización territorial del Estado*⁵³⁸, *Las reformas*⁵³⁹, *El Partido Socialista Obrero Español*⁵⁴⁰– se constata como en su mayor parte pocos trabajos académicos han venido a publicar los mismos sobre la época socialista. A ello se suma otra evidencia fácil de apreciar: la falta de voces críticas tanto de historiadores como de otros investigadores con respecto a la época socialista a lo que se sumaría llamativas ausencias de determinados especialistas. También sobresale la falta de mesas dedicadas ya no al movimiento obrero o al mercado de trabajo, sino concretamente a la UGT.

⁵³¹ Toda la información que se cita a continuación procede de la siguiente página web: www.congresohistoriasocialista.es. Véase también lo apuntado en *Presentación, nota 66*.

⁵³² Antonio Segura Más, “La influencia de los socialismos europeos en los primeros gobiernos de Felipe González”.

⁵³³ Juan Avilés Farré, “Del marxismo a la modernización: el proyecto socialista”; José Ramón Montero, “Elecciones y sistema de partidos: del cambio a la alternancia”.

⁵³⁴ Pedro A. Martínez Lillo, “Teoría y práctica de la política exterior socialista”; José Luis Neila Hernández, “Hacia una política global mediterránea”; Ricardo Martín de la Guardia, “España en las Comunidades Europeas: el desafío de la implantación al este de Europa”.

⁵³⁵ Con la participación de Josefina Cuesta Bustillo.

⁵³⁶ Charles Powell, “¿España en su sitio? Alternativas conservadoras a la política del PSOE, de Fraga a Aznar”; Rafael Quirosa-Cheyrouze, “Los proyectos de centro político, una alternativa al bipartidismo”; Feliciano Montero García, “Iglesia, católicos y gobiernos socialistas. Percepciones recíprocas”.

⁵³⁷ Joaquín Estefanía, “El segundo ajuste económico de la democracia”; Juan Jesús González, “La etapa socialista (1982-1996): sociedad y política”; Álvaro Soto Carmona, “El conflicto como respuesta social pero también política”.

⁵³⁸ Isidro Sepúlveda Muñoz, “De la consolidación del Estado de las autonomías al cuestionamiento de la nación española. Evolución del sistema autonómico, 1982-1996”; Xóse M. Núñez Seixas, “La cuestión nacional en la época socialista: entre la armonización autonómica y el patriotismo constitucional (1982-1996)”.

⁵³⁹ Gregorio Rodríguez Cabrero, “El Estado del Bienestar en España (1982-1996): universalización y reestructuración”; Fernando Puell de la Villa, “La política de seguridad y defensa (1982-1986)”; Eduardo González Calleja, “Entre la normalización institucional y la «guerra sucia» antiterrorista: la política de orden público de los gobiernos del PSOE”.

⁵⁴⁰ Abdón Mateos, “La evolución interna del PSOE en el poder”.

A la espera de la publicación del libro colectivo correspondiente, las comunicaciones allí defendidas prueban buena parte de lo hasta dicho. No obstante, las 45 comunicaciones finalmente presentadas en los diferentes paneles –*Historia política* [19] (dividida a su vez en, *Estudios regionales*, *Partidos*, *Nación y nacionalismos*), *Relaciones Internacionales* [10], *Cultura y medios* [7], *Economía y Sociedad* [9]– podrían llegar a hacer pensar que sobre las cuestiones allí tratadas existen numerosas líneas de investigación en marcha. Nada más lejos de la realidad. Un dato a destacar: un significativo número de las comunicaciones no procederían de la mano de los historiadores.

Un análisis con cierta profundidad de las aportaciones en el primer apartado, vuelve a mostrar el claro corte cronológico de 1982. Menos de la mitad tratan el periodo de los gobiernos socialistas⁵⁴¹. A ello se suma otra evidencia: la falta de interés por el estudio de la evolución político-ideológica del socialismo, tanto dentro del Partido como del Gobierno. PSOE y gobierno socialista se convertirían, en buena medida, así en un escenario histórico dado, a partir del cual construir los relatos. Por el contrario, destaca como a pesar de tratarse de un congreso en torno a la época socialista en el apartado 1.2. *Partidos* cerca de la mitad de las comunicaciones, precisamente, traten la evolución ideológica y política de la derecha española⁵⁴². Como es de reseñar que, en ninguno de los casos, se trate aspectos tan atractivos como el XXVIII Congreso o otras crisis políticas de estos años.

Lo que a su vez contrasta con el claro predominio de los estudios locales o regionales⁵⁴³ –en consonancia con las líneas de investigación mayoritarias– así como un claro interés por la cuestión electoral antes que estrictamente programática⁵⁴⁴. Un signo no sólo de la falta de renovación de una historia política anclada en los ciclos electorales, sino de claro corte institucionalista. En todo caso, a modo de novedad temática, se incorporaba en este primer apartado la relación del socialismo y los nacionalismos –también en línea con determinados intereses historiográficos⁵⁴⁵–. Tampoco es baladí, por ejemplo, el amplio repertorio de comunicaciones relacionadas con las relaciones internacionales, con trabajos de relieve como los de Luca Constantini⁵⁴⁶ o Pilar Sánchez Millás⁵⁴⁷. Otro tanto puede decirse de las

⁵⁴¹ Por ejemplo, COLOMER RUBIO, Juan Carlos, “«Vivíamos tan depresiva que no veíamos el paisaje»: La victoria socialista en las elecciones municipales valencianas de 1979, tensiones y rupturas”; o, LEÓN CÁCERES, Guillermo, “Trayectoria de los partidos socialistas en Badajoz durante la transición: algunos jalones”.

⁵⁴² A destacar: CORPAS AGUIRRE, M^a Ángeles, “Alianza Popular (1982-1989). El techo de cristal, Fraga sucesor de sí mismo”; o, CARRIÓN SÁNCHEZ, Pablo Jesús, “El Partido Popular: refundación del centro derecha como alternativa (1989-1996)”.

⁵⁴³ A pesar de la ausencia de dos casos claves como pudieran ser Madrid o Barcelona, véanse: BERZAL de la ROSA, Enrique, “Castilla y León se estrenó de rojo: auge y declive del PSOE entre 1983 y 1987”; ROYO ROMANILLOS, Verónica, “La primera etapa socialista en Aragón (1982-1996): una perspectiva electoral”.

⁵⁴⁴ Por citar solamente dos ejemplos: BOUZAS HERRERA, Javier, “El fin del predominio socialista. Las elecciones generales de 1993”; o el interesante texto de DÍAZ-DELGADO LEZA, Jorge, “Morir de éxito. Las técnicas y estrategias electorales del PSOE como factor explicativo de su triunfo en las urnas. La campaña electoral de 1982 como culminación de un éxito”.

⁵⁴⁵ Consúltense la comunicación del especialista, HUMLEBÆK, Carsten, “Discurso sobre la nación española del PSOE en el Parlamento, 1982-2008”; y, MONTERO LOGROÑO, Inma, “El reflejo del discurso nacional. El PSOE a través de la prensa”.

⁵⁴⁶ COSTANTINI, Luca, “La redefinición ideológica de los partidos socialistas italianos y español en los años 1976-1986”.

⁵⁴⁷ SÁNCHEZ MILLAS, M^a del Pilar, “Estados Unidos y el Partido Socialista Obrero Español. Cómo el PSOE moderó su discurso sobre Estados Unidos en los congresos y en los programas electorales entre 1974 y 1990”.

aportaciones al apartado *Cultura y medios*⁵⁴⁸. Y aquí sí es claro el reflejo del enfoque sociocultural. Desde trabajos sobre la fotografía española, pasando por las técnicas comunicativas hasta el propio cambio cultural en tiempos socialistas, reflejan la que es a día de hoy, una de las líneas de investigación mayoritarias. Ahora bien, es, precisamente, en el apartado *Economía y Sociedad* cuando se visualiza más claramente las diferentes “crisis” por la que ha atravesado la historia social. Ni una sola comunicación se dedica ya no sólo hablar de los costes sociales y económicos de la modernización socialista o del mercado de trabajo, sino es que no hay ninguna dedicada al movimiento sindical⁵⁴⁹.

A lo anterior, habría que destacar otras dos características, en términos generales, altamente significativas. Además de la ausencia mayoritaria de trabajo con fuentes de archivo, las mismas se caracterizan –sin pretender realizar ningún tipo de generalización– por la falta de aparato crítico o al seguimiento de las publicaciones más recientes.

En suma, las comunicaciones al citado Congreso evidenciarían, por un lado, una lenta apertura de la agenda investigadora en torno a la época socialista, lo que, en cualquier caso, no significa que este tiempo histórico figure entre las prioridades de las “agendas investigadoras” de la historiografía profesional; y, por otro lado, las mismas nos hablan, ante todo, del escaso interés que despierta el estudio de las acciones gubernamentales en aspectos claves tanto en la economía como en la sociedad, pero también a nivel del terreno político, que, claro está, no empieza ni termina con los procesos electorales.

Terreno todavía prácticamente “virgen” para los historiadores, la *época socialista*, no obstante, acapara determinados “consensos historiográficos” que viéramos en líneas anteriores. Son precisamente aquellas *imágenes-fuerza* a nivel colectivo, las que en parte han estructurado la mayor parte de los relatos sobre este periodo histórico. Con escasos puntos de desencuentro y todavía menos puntos de crítica y/o disenso –y a falta de debates propiamente dichos– resulta extraordinariamente sintomático como la mayor parte de las principales referencias procedan de manuales al uso.

Entre las principales referencias que pueden y deben citarse, en primer lugar, habría que destacar la obra de Charles Powell, *España en democracia, 1975-2000*. Su largo apartado dedicado a “La era socialista” constituye a día de hoy la visión más parcial –no diremos objetiva– y mejor construida –desde el conocimiento en profundidad de dicho periodo histórico– que se haya escrito. Todo ello, por más que refleje los principales *consensos historiográficos liberales*. Tanto en el capítulo “6. El primer gobierno del PSOE, 1982-1986” como de forma destacada en el “7. El PSOE y los dilemas de la socialdemocracia, 1986-1993”, se profundiza en las principales cuestiones candentes, con una capacidad de síntesis poco común en nuestra historiográfica, a lo que se suma un amplio conocimiento de la bibliografía existente⁵⁵⁰. En segundo término, ha de reseñarse el capítulo del profesor Julio Aróstegui –“La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)”– dentro de la obra colectiva

⁵⁴⁸ De notable interés: CALERI, Sereno, “La fotografía española en tiempo de cambio: de los estudios fotográficos a la movida madrileña”; MARTÍN JIMÉNEZ, Virginia, “El camino a la presidencia del Gobierno: los inicios de la comunicación política televisiva del PSOE (1976-1979); o, RODRÍGUEZ DÍAZ, Nuria y CALERI, Sereno, “El cambio cultural durante el primer socialismo: cultura y espectáculo”.

⁵⁴⁹ Un apartado de *Economía y Sociedad* en donde destacarían los aspectos relacionados con las fuerzas militares. Por ejemplo, QUESADA GONZÁLEZ, José Miguel, “Adaptación del reclutamiento a la nueva realidad social, militar y estratégica: reformas del servicio militar durante la primera etapa socialista”.

⁵⁵⁰ POWELL, Charles, *España en democracia, 1975-2000*, Barcelona, Debolsillo, 2002 [primera edición en, Barcelona, Plaza & Janés, 2001].

*Historia de España, siglo XX*⁵⁵¹. El ya catedrático emérito viene a plantear una aguda como bien construida visión de la época socialista, no sin pocas dosis de ironía y de críticas subyacentes, aportando datos y puntos de reflexión a tener presente. En tercer lugar, ha de hablarse de la monografía de Álvaro Soto Carmona, *Transición y cambio en España, 1975-1996*⁵⁵². Estamos aquí ante otra referencia central, que tiene además la voluntad de acercarse a aspectos sociales – desde el mercado de trabajo pasando por la economía– y que aborda, al mismo tiempo, los aspectos relacionados con la conflictividad social y laboral. En cualquier caso, y como ya hemos referenciado, lejos de tradición británica de la que *bebe* Powell así como del acento crítico de Aróstegui, se vuelve a estar ante otro claro ejemplo de una visión amable –antes que edulcorada– de la época socialista. A los citados “manuales” se podrían añadir otros. Entre ellos, uno de los muchos redactados por Javier Tusell –*La España actual (1982-2000)*⁵⁵³– o el volumen firmado por José Marín Arce, Carme Molinero y Pere Ysàs, *Historia política, 1939-2000*⁵⁵⁴. Un espacio este en donde también debe destacarse la obra de referencia –recientemente reeditada– de Mercedes Cabrera y Fernando del Rey Reguillo, que aborda en sus últimos capítulos las relaciones entre la clase empresarial y el PSOE, y que siguen constituyendo el más certero examen sobre dicho aspecto⁵⁵⁵.

Ya nos hemos referido anteriormente a la inexistencia de monografías especializadas. Un vacío que ha venido a resolver, en parte, el volumen VI de la *Historia de la UGT* firmado por Rubén Vega⁵⁵⁶. A pesar de que el libro no deja de ser una especie de manual, bien se puede calificar como una monografía con trabajo de campo. Un estudio que arranca desde 1976 y que concluye en 1994, y que a través de sus casi cuatrocientas páginas aborda la otra cara del socialismo: la sindical. En base a un trabajo de fuentes y documentado a partir de las escasas

⁵⁵¹ ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España, siglo XX (1939-1996)*, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 243-363.

⁵⁵² SOTO CARMONA, Álvaro, *Transición y cambio en España, 1975-1996*, Madrid, Alianza Editorial, 2005; id., *Atado y bien atado: institucionalización y crisis del franquismo*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. Y asimismo: id. (dir.), *Clase obrera, conflictividad laboral y representación sindical: evolución socio-laboral de Madrid, 1939-1991*, Madrid, GPS, 1994.

⁵⁵³ TUSELL, Javier, *La España actual (1982-2000)*, Barcelona, Labor, 2001; id. y SOTO CARMONA, Álvaro, *Historia de la transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza, 1996 [*Congreso Internacional sobre Historia de la Transición y consolidación democrática en España*].

⁵⁵⁴ MARÍN, José M^a, MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere, *Historia política, 1939-2000*, Madrid, Istmo, 2001, y en concreto de esa obra, MARÍN, José M^a, “La democracia consolidada, 1982-2000” (pp. 321-480)^o. Igualmente: BARRERA DEL BARRIO, Carlos, *Historia política de la España reciente (1962-1996): tardofranquismo, transición y democracia*, Pamplona, Newbook, 1999; o, PANIAGUA, Javier, *La transición democrática: de la dictadura a la democracia en España (1973-1986)*, Madrid, Anaya, 2009.

⁵⁵⁵ CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de los empresarios. Política e intereses económicos en la España contemporánea (1875-2000)*, Madrid, Taurus, 2002 [recientemente reeditada, Barcelona, RBA, 2011]. Por lo demás, trabajos clásicos realizados por historiadores sobre la historia económica contemporánea en España en: TORTELLA, Gabriel, *El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX*, Madrid, Alianza, 1994; NADAL, Jordi, CARRERAS, Albert y SUDRIÀ, Carles (comps.), *La economía española en el siglo XX: una perspectiva histórica*, Barcelona, Ariel, 1991 [1987]; NADAL, Jordi [et al.], *La cara oculta de la industrialización española. La modernización de los sectores no líderes (siglos XIX y XX)*, Madrid, Alianza, 1994.

⁵⁵⁶ VEGA, Rubén, *Historia de la UGT...*, op.cit. En concreto consúltase el apartado “12. Bibliografía”, en donde destacaría: «La UGT carece de forma llamativa de monografías rigurosas que aborden su historia en el periodo de referencia de este volumen». Ibídem, p.369. Del mismo autor, id., *Crisis industrial y conflicto social: Gijón 1975-1995*, Gijón, Trea, 1998.

referencias especializadas disponibles, la monografía del profesor titular de la Universidad de Oviedo ha pasado a constituirse en una referencia fundamental⁵⁵⁷.

Remarcábamos en páginas anteriores que las principales aportaciones han venido de la mano de dossier monográficos en revistas especializadas de historia. Aquí tampoco las referencias son abundantes. El ya varias veces citado dossier coordinado por Álvaro Soto Carmona, *La primera legislatura socialista*, sería el primero de su género que se publicara. Más allá de la limitación temporal de su objeto de análisis, y del acercamiento *amable* a tales años, no se incluiría en el mismo ningún trabajo historiográfico sobre los temas objetos de investigación, si exceptuamos el ya mencionado de José María Marín Arce —el que sea, a buen seguro, el historiador profesional que más se ha detenido en la época socialista⁵⁵⁸— acerca de la reconversión industrial en donde ampliaría temporalmente su tesis doctoral⁵⁵⁹. Cinco años tendrían que pasar para que la prestigiosa revista *Ayer*, dedicara otro dossier a la época socialista. Un número coincidente en el tiempo con la celebración del citado *Congreso de Historia Socialista*. Dirigido en esta ocasión por Pere Ysàs en él encontramos, una vez más, balances generales que prácticamente repiten la temática del anteriormente citado. En todo caso, *La época socialista: política y sociedad (1982-1996)* supone un paso cualitativo, tanto por la ampliación temporal como por los propios trabajos allí contenidos. Junto al propio texto de Ysàs —*Cambios y continuidades: tres lustros de gobierno socialistas*— ha de destacarse el de José Antonio Pérez Pérez —*Una sociedad en transformación (1982-1996)*. Trabajos que se internan por los aspectos menos amables de los ejecutivos socialistas, incluyendo en esta ocasión un balance distante a la par que crítico sobre las cuestiones políticas, sociales y económicas⁵⁶⁰.

Concluye aquí el breve estado de la cuestión de los gobiernos socialistas desde el campo historiográfico. A la espera de que, por fin, estos intensos y vibrantes años —a su vez repletos de acontecimientos y hechos de primer orden— entren en nuestra *agenda investigadora*, el balance

⁵⁵⁷ Entre otros pocos, y en su mayor parte centrados en el periodo franquista o durante la transición a la democracia, véanse los siguientes: BERNAD, Enrique y FORCADELL, Carlos (eds.), *Historia de la Unión General de Trabajadores de Aragón. Un siglo de cultura sindical y socialista*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2000; GIRÓN, José, *Breve historia de la UGT de Asturias: 1975-1986*, Oviedo, Fundación Asturias, 1998; PARDO, Gustavo, *Breve historia de la UGT de Asturias: 1986-1994*, Oviedo, Fundación Asturias, 1998; BALLESTER, David, *Els Homes sense nom: l'exili i la clandestinitat de la UGT a Catalunya (1939-1976)*, Barcelona, Viena Edicions, 2003; FERNÁNDEZ SUÁREZ, Sergio, *25 años UGT-Euskadi. Historia social y del movimiento obrero*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2003; REDERO SAN ROMÁN, Manuel (ed.), *La Unión General de Trabajadores en Castilla y León (1988-1998). Historia de un compromiso social*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004 [del mismo autor, id., “Los sindicatos en la democracia: de la movilización a la gestión” en PÉREZ LEDESMA, Manuel (ed.), *Las izquierdas en la España democrática*. Dossier monográfico, *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, nº 20, (2008), pp. 129-158]. E igualmente, ALTED, Alicia, AROCA MOHEDANO, Manuela y COLLADO JIMÉNEZ, Juan Carlos (coords.), *El sindicalismo socialista español: una aproximación oral a la historia de UGT (1931-1975)*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2010; y, SANTOS, Félix y AROCA MOHEDANO, Manuela (dirs.), *Internacionalismo en la historia reciente de UGT, 1971-1986*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2012.

⁵⁵⁸ MARÍN ARCE, José M^a, “Diez años de gobierno del PSOE (1982-1992)”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, nº 13, (2000), pp. 189-209; id., “Los socialistas en el poder (1982-1996)” en PÉREZ LEDESMA, Manuel (ed.), *Las izquierdas en...*, *op.cit.*, pp. 43-71.

⁵⁵⁹ SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*. Dentro de este dossier destacar los trabajos de, FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS CLAVERO, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones para entrar en las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” (pp. 39-60); o el de, MARÍN ARCE, José M^a, “La fase dura de la reconversión industrial: 1983-1986” (pp. 61-101).

⁵⁶⁰ YSÀS, Pere, “Presentación” en id. (ed.), *La época socialista...*, *op.cit.*. Y dentro del mismo tanto el texto del editor, id., “Cambios y continuidades: tres lustros de gobiernos socialistas” (pp. 23-49); y muy destacadamente, PÉREZ PÉREZ, José Antonio, “Una sociedad en transformación (1982-1996)” (pp. 99-127).

es claro: se cuenta con una bibliografía en crecimiento aunque limitada, y orientada, la mayor parte de las veces, a una historia política “clásica”.

2.3. *Papeles para una historia del presente vivido*

Advertía Edward Carr –tal y como vimos en la *Presentación*– del riesgo de convertir a los *papeles* con los que trabaja el historiador en meros fetiches⁵⁶¹. Por otro lado, no han sido pocas las reflexiones en torno a las dificultades a las que se enfrentan los historiadores interesados en examinar un tiempo demasiado cercano⁵⁶². Obstáculos que siempre remiten a la cuestión documental. Y a pesar de lo cual, no cabe dramatizar ni menos desistir.

No volveremos a incidir en cuestiones teóricas en esta ocasión, aunque sí en las técnico-jurídicas así como de otro “signo”. Si bien se ha mostrado la más que amplia bibliografía disponible para el estudio de los ejecutivos socialistas, toca ahora realizar el correspondiente balance acerca de las referencias documentales al respecto. A reflexionar en torno a las fundadas dificultades para historiar nuestro tiempo vivido se dedica la primera parte de este epígrafe. En los restantes, se recorrerán las fuentes primarias, secundarias y de otro tipo que han sido empleadas en la presente investigación. Un balance en el que también se incidirá en la importancia que cobra las fuentes estadísticas de cara radiografiar la realidad social y laboral española de la década de los ochenta.

2.3.1. Anomalías, obstáculos jurídicos y demás voluntades políticas

Constituye un paso obligado referirse, en primer lugar, a la siempre mencionada Ley 16/1985, de 25 de junio, de *Patrimonio Histórico Español*⁵⁶³. Pero sobre todo a su artículo 57.1c en donde se decretaba lo siguiente:

«c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos».

Hablar hoy de los problemas de acceso y consulta se ha hecho común al calor del denominado “proceso de recuperación de la memoria histórica” democrática. No han faltado las correspondientes críticas ni denuncias de un sistema que ha favorecido claramente la pervivencia del llamado “modelo español de impunidad”⁵⁶⁴. Un sistema archivístico que se ha mantenido prácticamente inmutable, y que a falta de una Ley de Archivos –que ni está ni se la espera, a pesar de que en la Ley 16/1985 se comprometía a desarrollar la misma en un plazo ya hace tiempo superado– y por más que recientemente se aprobará el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, *por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su*

⁵⁶¹ CARR, Edward H., “El historiador y los hechos” en *¿Qué es la...*, *op.cit.*, p. 62.

⁵⁶² Véanse aquí las reflexiones, entre otras muchas, de, SOTO GAMBOA, Ángel, “Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización”, *Historia Actual Online*, nº 3, (2004), pp. 101-116; PASAMAR, Gonzalo, “Formas tradicionales y formas modernas de la «Historia del Presente»”, *Historia Social*, nº 62, (2008), pp. 147-169. Asimismo consúltense las referencias citadas en *Presentación*, nota 153.

⁵⁶³ Ley 16/1985, de 25 de junio, de *Patrimonio Histórico Español* [B.O.E. 29 de junio de 1985].

⁵⁶⁴ Nos remitimos aquí a: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “El proceso por la recuperación de la «memoria histórica»”, *International Journal of Iberian Studies*, nº 19 (I) (2006), pp. 25-51; id., “Presentación. La «memoria histórica» como conflicto” en id. (dir.), *La memoria como...*, *op.cit.*; o, id., “Memorias, historia, derechos humanos, políticas públicas. Reflexiones en torno a la práctica historiográfica. Un balance revisitado” en ARÓSTEGUI, Julio y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (eds.), *Generaciones y memoria de la represión franquista*, Valencia, Universitat de València, 2010, pp. 15-35.

*régimen de acceso*⁵⁶⁵; el mismo sigue presentando serios obstáculos y no pocas anomalías en un contexto comparado a nivel internacional. A lo que ha de añadirse la vigencia de una normativa pre-constitucional sobre los secretos oficiales a través de la Ley 9/1968⁵⁶⁶. O sin ir tampoco muy lejos la más que restrictiva Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, *de Protección de Datos de Carácter Personal*⁵⁶⁷. Normativas que han hecho prevalecer el derecho a la intimidad, el derecho al honor, por encima del derecho a la información, y que no invitan, precisamente, a indagar por cuestiones llamémosles, en este caso, “sensibles”.

Pese a que el sintético cuadro jurídico-legal anterior puede llegar a generar cierta desazón al investigador novel y no tan novel, ha sido común obviar –o cuando menos no interesarse debidamente– por los amplios y legitimados derechos que tanto como ciudadanos estrictamente como investigadores, se contemplan y se tienen en un sistema democrático. Un *sistema* en donde toda la documentación generada por las instituciones y administraciones debería ser de acceso público, excepto en determinados y muy concretos casos.

La singularidad del caso español es evidente se observe desde donde se observe. Por ejemplo, sigue uno de los cinco países de la Unión Europea que sigue careciendo de una Ley de Transparencia Informativa. Todo ello por más que existan numerosos tratados internacionales o directamente que el Consejo de Europa aprobara en su momento el “Convenio de Acceso a Documentos Oficiales”⁵⁶⁸. En verdad, no han faltado ni las redacciones ni los proyectos avanzados de una posible Ley en estos últimos años⁵⁶⁹. En todas y cada una de las ocasiones – como sucedió recientemente en enero de 2011⁵⁷⁰ – los diferentes ejecutivos terminarían “enterrando” los mismos. En cualquier caso, tal y como ha indicado la Coalición Pro-Acceso se ha de tener muy presente lo siguiente:

«El derecho de acceso a la información es *un derecho fundamental* reconocido por la legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo. Es también conocido como el *derecho a saber* o *libertad de información*.

⁵⁶⁵ Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, *por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso* [B.O.E. 25 de noviembre de 2011].

⁵⁶⁶ Ley 9/1968, de 5 de abril, *sobre secretos oficiales* [B.O.E. 6 de abril de 1968].

⁵⁶⁷ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, *de Protección de Datos de carácter personal* [B.O.E. 14 de diciembre de 1999].

⁵⁶⁸ COUNCIL OF EUROPE, “Convention on Access to Official Documents”, 2008 [Adopted by the Committee of Ministers on 27 November 2008 at the 1042bis meeting of the Ministers’ Deputies]. [www.wcd.coe.int]. Por lo demás, consúltese el documentado trabajo de, GUICHOT, Emily, “Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y propuestas legislativas”, *Documento de Trabajo. Fundación Alternativas*, nº 170, (2011).

⁵⁶⁹ Así por ejemplo se filtraría el “Anteproyecto de ley de transparencia y acceso a los ciudadanos a la información pública”, durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Consúltese el mismo en: www.accessinfo.org/documents/Access_Docs/Advancing/Spain/Espana_Anteproyecto_Ley_Transparencia.pdf. Cuando se estaba en la fase de redacción de la presente tesis doctoral el ejecutivo del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy presentaría y aprobaría en un Consejo de Ministros el primer proyecto al respecto en España. Un proyecto duramente criticado por no pocas organizaciones y que en cualquier caso lejos está de normativas como la de Estados Unidos o directamente la *convención* aprobada por el propio Consejo de Europa. “El Gobierno presenta la Ley de Transparencia”, *Nota de prensa*, Ministerio de Presidencia, 23 de marzo de 2012 [www.mpr.es]. El texto del proyecto puede consultarse en, www.leydetransparencia.gob.es [consultado 09/IV/2012].

⁵⁷⁰ Noticia, “El Gobierno entierra la Ley de Transparencia”, *Público*, 17 de enero de 2011.

El derecho de acceso a la información es el derecho de toda persona de solicitar y recibir información de entidades públicas. Este derecho también obliga a las entidades públicas a publicar»⁵⁷¹.

Así pues nos encontramos ante un sistema en que pese a los obstáculos citados y demás arbitrariedades –legales o no legales con predominio de esta segunda forma– ofrece una serie de herramientas jurídicas que rara vez –seamos sinceros– son empleadas con todas sus consecuencias. Quizás lo que se comente a continuación resulte obvio, pero la propia lógica no deja de estar reñida, en ocasiones, con determinadas formas de actuación. Así, por ejemplo, cabría recordar como en el artículo 49.2 de la Ley 16/1985 –dentro del Título VII, *Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos*, integrado a su vez en el Capítulo I, *Del Patrimonio Documental y Bibliográfico*– se señalaba lo siguiente:

«Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios».

Lo que traducido en otros términos viene a significar que todo ciudadano en un sistema democrático no debería sino que puede acceder, a través de la denominada “consulta pública”, a ese mismo Patrimonio Documental, tal y como se indica en el artículo 57.1a con las limitaciones descritas:

«Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y depositados y registrados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de Derecho Público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos».

Es decir, hablamos de un derecho pero también de un deber en donde el Estado ha de “[g]arantizar el acceso de los ciudadanos públicos” a tal documentación, tal y como se puede leer en el artículo 14a del RD 1708/2011. Una normativa que en su artículo “23. Derecho de acceso a documentos y archivos” se indicaba en su primer punto lo siguiente:

«Toda persona tiene derecho a acceder a los documentos conservados en los archivos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma, en los términos establecidos en el presente capítulo sin perjuicio de las exclusiones y limitaciones previstas en la Constitución y en las leyes».

Más allá de aclararse en el RD 1708/2011 este derecho fundamental y de desarrollarlo más extensivamente que su normativa predecesora –véase, al respecto, su “Artículo 24. Solicitud de acceso”– en cualquier caso volvería a incidir en las limitaciones presentadas en su día en el artículo 57.1c en esta ocasión a través del “Artículo 26. Acceso restringido” y en el “Artículo 28. Solicitud de consulta de documentos de acceso restringido por contener datos personales”⁵⁷². Todo ello con una nota tan característica de nuestro sistema archivístico: el

⁵⁷¹ Extraído del Manifiesto del Grupo Pro Acceso [www.proacceso.org/el-derecho-a-saber/]. Véase también, COZÁR, Álvaro de, “Nos lo ocultan, ¿por qué?”, *El País*, 18 de marzo de 2012.

⁵⁷² «Los documentos conservados en los archivos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma serán de libre acceso, salvo cuando les afecte alguna de las limitaciones previstas en la Constitución y en las Leyes. En particular, serán de acceso restringido los documentos clasificados según lo dispuesto en la normativa sobre secretos oficiales, los documentos que contengan información cuya difusión pudiera entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o interferir en la averiguación de los delitos o la tutela judicial efectiva de ciudadanos e instituciones, así como los declarados reservados por una norma con rango de Ley y aquellos que contengan datos personales a los que se refiere el artículo 28». Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, *por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso*.

reforzamiento de la potestad de la figura del archivero. Un reforzamiento, por cierto, que tiene una serie de antecedentes próximos, tal y como sucedería durante la tramitación de la conocida popularmente *Ley de Memoria Histórica*⁵⁷³.

Con la Ley 16/1985 y el RD 1708/2011, en principio, toda la documentación de la “época socialista” relativa, por ejemplo, a las reformas laborales, al Programa Económico a Medio Plazo u otros tantos documentos relacionados con cuestiones estrictamente técnicas, deberían estar a disposición del investigador una vez cerrados los expedientes correspondientes, en tanto no conculcan ni los artículos 57.1 y el artículo 26, respectivamente. ¿Es así? No.

Ya en el terreno de las realidades del trabajo de campo día a día, resulta que pese haber transcurrido treinta años desde la formación de los gobiernos socialistas, probablemente falta todavía un largo tiempo para que dicha documentación pueda ser consultada. De hecho, se desconoce incluso un posible inventario de la documentación de carácter administrativo e institucional que se conserva. Y decimos se “conserva” por una sencilla como evidente razón a quien haya trabajo en los archivos españoles: la más que constata tradición “patrimonialista” de los cargos públicos –desde el Presidente del Gobierno pasando por el Ministro hasta el Secretario de Estado– a considerar como propios la documentación generada durante su tiempo

⁵⁷³ En el primer proyecto de la que sería la futura Ley de Memoria Histórica –MINISTERIO DE PRESIDENCIA, *Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura*, Madrid, Ministerio de Presidencia, 2006– se incluiría el artículo 25.3. en donde se señalaba lo siguiente: «El acceso a los documentos contenidos en los archivos a que se refieren los apartados anteriores se regirá por lo previsto en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 57 será de especial aplicación cuando los documentos identifiquen a los autores o a otras personas intervinientes en los hechos o en las actuaciones jurídicas sobre los mismos, en cuyo caso los responsables de los archivos públicos sustituirán la entrega de una copia de los mismos por un certificado sobre su contenido, con el fin de preservar la identidad de aquellos». Aunque el mismo desaparecería durante la tramitación parlamentaria como recordó en su día Antonio González Quintana: «Esta versión de Ley de Punto Final usando a los archiveros como cómplices necesarios de la misma es absolutamente rechazable, desde todo punto de vista pero, sobre todo, desde la ética profesional. Además, pretende introducir de tapadillo una restricción en el acceso que nuestra legislación general no contempla. Ni la Ley 30/1992 *del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, ni la Ley 16/1985, *del Patrimonio Histórico Español*, prevén semejantes restricciones. La última de las citadas sitúa la restricción de acceso a los documentos que afecten a la intimidad de las personas en veinticinco años después del fallecimiento de la persona afectada, o, caso de no conocerse el dato de la muerte, cincuenta años después de la fecha del documento (que es lo que sucede en la mayoría de los documentos que estamos tratando, al menos los anteriores a 1957); pero es que haber pertenecido a un consejo de guerra, o haber ordenado el asesinato de ciudadanos, por ejemplo, no puede considerarse un dato íntimo en ningún caso. Si la Ley se aprobara con ese texto, independientemente de cualquier otra consideración política que nos merezca, estaríamos dando un paso atrás enorme en la accesibilidad a los documentos de los archivos públicos y, más grave aún, estaríamos consolidando, con los archivos como herramienta el modelo amnésico de impunidad que caracterizó nuestra transición». GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio, “La política archivística del gobierno español y la ausencia de gestión del pasado desde el comienzo de la transición” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Generaciones y memoria de la represión franquista*. Dossier monográfico, *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, nº 6/7, (2006/2007). Sobre esta cuestión que parece no tener fin o cuando menos una solución razonable, nos remitimos a las valoraciones al respecto de: BABIANO, José, “El poeta desaparecido, el juez depurado y el obrero invisible (tres perfiles de la llamada memoria histórica)” en FUNDACIÓN 1º DE MAYO, *2010 Anuario*, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2011, pp. 390-391; MOLINERO, Carme, “El acceso a los archivos y la investigación histórica”, *Ayer*, nº 81, (2011), pp. 285-297; y nuevamente a, GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio, “Archivos y derechos humanos. Recomendaciones desde el Consejo Internacional de Archivos” en BABIANO, José (ed.), *Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana*, Madrid, Fundación 1º de Madrid / Ediciones GPS, pp. 189-199.

de gestión pública. Así por ejemplo, se sabe de la existencia de un archivo personal-privado de Felipe González con una amplia documentación personal-institucional⁵⁷⁴.

En esta posible lista de obstáculos –así como de agravios, dicho sea todo– pesa la más que fundada sospecha de una posible destrucción –masiva o no– de documentación “sensible”. Si por ejemplo, para el periodo franquista Rodolfo Martín Villa y Salvador Sánchez-Terán no tuvieron recato en reconocer sus propias ordenes de destrucción de documentación⁵⁷⁵; a lo largo de estas últimas décadas, y concretamente durante el traspaso de poderes del gobierno socialista al gobierno popular en 1996 así como ocho años más tarde en el sentido contrario, saltarían a la primera página de los medios, similares ordenes⁵⁷⁶. Por cierto, los mismos responsables de tal traspaso de poderes calificarían los mismos como “ejemplares”. Un hecho rara vez resaltado en las memorias de los dirigentes políticos socialistas, si exceptuamos, una vez más, a Almunia quien recordaba cómo se encontró a su llegada al despacho del Ministerio de Trabajo en diciembre de 1982 con la caja fuerte sin un solo papel⁵⁷⁷.

No terminan aquí las dificultades prácticas cotidianas ya descritas, pues junto a la falta de conocimiento de lo que se conserva y no se conserva, lo que se haya o no destruido, se suman otras realidades bastante conocidas. De esta forma, uno de los grandes problemas del actual sistema archivístico español es su colapso documental, lo que afecta seriamente a un posible rastreo en busca de cualquier *papel*.

«Esta desfavorable circunstancia [el agotamiento de la capacidad de los archivos de la administración] viene dando ocasión a destrucción de una gran parte de la documentación oficial que posee no sólo interés histórico, sino también en muchas ocasiones plena vigencia administrativa.

⁵⁷⁴ Comunicación personal de Juan Pablo Fusi al autor en septiembre de 2004.

⁵⁷⁵ MARTÍN VILLA, Rodolfo, *Al servicio del Estado*, Barcelona, Planeta, 1984; y, SÁNCHEZ-TERÁN, Salvador, *La Transición: síntesis y claves*, Barcelona, Planeta, 2008.

⁵⁷⁶ Por ejemplo, Noticia, “El equipo de Aznar borró los archivos informáticos de Presidencia antes de irse”, *El País*, 13 de diciembre de 2004. Otro tanto –como adelantábamos sucedería ocho años antes– tal y como detallaron en su día José Díaz Herrera y Isabel Durán: «Al día siguiente, el nuevo Secretario [José María Michavila] hizo indagaciones entre el personal de la casa [La Moncloa] sobre quién había mandado inutilizar el sistema informático. Después de vencer muchas reticencias logró enterarse de que detrás de la orden se encontraba la gente del ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, el verdadero ‘cerebro’ pensante de la Moncloa. No fue su único hallazgo. Al revisar los archivos del Gobierno descubrió la existencia de numerosos huecos debido a que muchos de los expedientes que figuraban consignados en los libros de registro habían sido retirados de los lugares que debían estar custodiados y se encontraban desaparecidos [...]. El equipo que hizo la limpieza, supuestamente bajo las órdenes directas de uno de los últimos subsecretarios socialistas del Ministerio de la Presidencia no se dio por satisfecho con reducir muchos legajos a tiritas. Por si alguien podía reconstruir alguno de los papeles, en lugar de depositarlos en los almacenes para que al día siguiente se los llevar el camión de la basura, las bolsas de plástico acabaron en el crematorio de la Moncloa, donde se destruyen las notas y la documentación que los miembros del Gabinete toman durante los consejos de ministros». HERRERA, José Díaz y DURÁN, Isabel, *Pacto de silencio...*, *op.cit.*, pp. 117-118.

⁵⁷⁷ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*, pp. 145 y 149-150. Misma situación se encontraría el mismo Alfonso Guerra: «En aquellas primeras miradas sobre la realidad a la que llegaba quise conocer el archivo de la Vicepresidencia. Me informaron de que no existía archivo ninguno». Tras consultar con un ujier y proceder a abrir la caja fuerte no sin problemas ni dificultades se encontraría con el siguiente panorama: «Moví la puerta lentamente y divisé algo dentro; lo extraje: era un folleto rectangular en el que se leía ‘Arcas para caudales. Instrucciones. Esto fue todo lo que encontré, el manual de instrucciones, en la caja fuerte de la Vicepresidencia del Gobierno, donde esperaba encontrar los documentos secreto que por su trascendencia para la seguridad del Estado habrían de estar férreamente custodiados». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, *op.cit.*, pp. 26 y 27, respectivamente. Con todo, lo más habitual ha sido calificar, aunque aquí se utilice un ejemplo quizás algo extremo, a tal traspaso como *ejemplar*, llegándose a calificar al mismo como típico de las «relaciones casi caballerescas entre el equipo de Calvo Sotelo y las personas de González para hacer la transición de un gobierno centrista a uno socialista». ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, *op.cit.*, pp. 246-247.

De otra parte, la acumulación de papeles en los archivos administrativos e incluso en las mismas oficinas y dependencias de la Administración dificultan el propio trabajo burocrático, eleva los costes de conservación y sostenimiento y no permite su aprovechamiento rentable de los locales destinados a la función pública.

Todo ello hace imprescindible establecer una corriente de documentación que permita garantizar la conservación de los documentos que han de tener un valor histórico y dar el trabajo adecuado a aquellos otros que tenga un valor temporal como reflejo de los derechos y deberes del Estado o de los ciudadanos, a la vez que descongestione las oficinas públicas y agilice la actuación administrativa».

Los anteriores párrafos no proceden de ningún reciente informe oficial, sino del Decreto 914/1969, de 8 de mayo, *de creación del Archivo General de la Administración Civil*, el hoy conocido como Archivo General de la Administración⁵⁷⁸. Creado con el fin de desatascar la situación descrita se establecía allí un “calendario de vida de documento”. En su artículo 3 se indicaba como pasados quince años del ingreso de la documentación en el Archivo Central de la correspondiente administración, estos deberían trasladarse al AGA. Incluso antes podía producirse dicho traspaso si se trataban de “series documentales [...] que tengan poco uso y se consulten raramente”. Concebido el AGA como un archivo intermedio –entre el archivo Central y el Archivo Histórico Nacional– se establecía finalmente en el artículo 3 la siguiente disposición:

«Por el Archivo General de la Administración Civil se formulará propuesta a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas para remitir al Archivo Histórico Nacional aquella documentación que con más de veinticinco años de antigüedad carezca, a su juicio, de validez administrativa y tenga valor histórico. La Dirección General resolverá en cada caso, previa consulta a los Departamentos Interesados».

Así pues, en teoría la documentación de los primeros diez años de gobierno socialista (1982-1996) debería, o bien, estar en el AGA o en el Archivo Histórico Nacional. Pero la teoría mal casa en este caso con la propia realidad que se describiera en su día en el propio Decreto 914/1969. Tanto la documentación administrativa generada por el Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo –por citar tan sólo dos casos, aunque otro tanto se podía decir del Archivo del Ministerio de Presidencia o todavía más sobre el Archivo del Ministerio del Interior– siguen conservándose en sus archivos centrales.

En un principio, se podría y se debería acceder a través de los mismos a la documentación de la época socialista. Ahora bien, las dificultades –tanto técnicas como prácticas– que los responsables de los archivos siguen poniendo, eso sí, siempre en base a una restrictiva lectura de la Ley 16/1985 –y a partir de ahora en base al RD 1708/2011 que todavía refuerza más su potestad como ya se ha dejado constatado– y ante el socorrido argumento de la falta de recursos humanos y técnicos; sigue dificultando acceder y consultar tal documentación. No faltan los ejemplos. De cara a nuestra investigación se realizaría la pertinente consulta al Archivo Central del Ministerio de Trabajo. A pesar de señalar en su propia página web que los fondos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social llegan hasta 1985 y que además cuenta con una base de datos informatizada⁵⁷⁹; nuestras concretas y sencillas solicitudes –a modo de mero “tanteo”– serían respondidas con un lacónico “resultado negativo” y el cierre de

⁵⁷⁸ Decreto 914/1969, de 8 de mayo, *de creación del Archivo General de la Administración Civil* [B.O.E. 26 de mayo de 1969]. Tan sólo en el ya nombrado RD 1708/2011 se ha vuelto a hacer mención –tras no pocos años– al citado decreto en la “Disposición transitoria primera. Normas y plazos de transferencias”: «Las normas y plazos de transferencias de documentos de los Departamentos ministeriales al Archivo General de la Administración establecidos en el Decreto 914/1969, de 8 de mayo de 1969, por el que se crea el Archivo General de la Administración, serán sustituidos progresivamente por los calendarios de conservación y normas técnicas de transferencia que se aprueben en el marco del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado». Por lo demás, consúltese, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, *del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común* [B.O.E. 27 de noviembre de 1992].

⁵⁷⁹ Véase: www.meyss.es/es/sec_bep/ArchivoCentral/index.htm.

la posibilidad de cualquier otra consulta. En concreto, solicitaríamos en aquella ocasión una serie de documentos de carácter técnico –con sus correspondientes títulos y fechas– relacionados con los proyectos legislativo de 1984, y que incluso, en su día, serían filtrados a la prensa.

Por lo demás, y fuera ya del ámbito del sistema público archivístico, otro serio impedimento para el estudio del socialismo español –a nivel del Partido en este caso– lo sigue constituyendo la política restrictiva de ampliación documental por parte de la Fundación Pablo Iglesias. Desde que se inició esta investigación en el año 2004 hasta cuando se escriben estas líneas, la documentación consultable relativa al propio PSOE llega hasta 1976 –y no toda, cabría matizar⁵⁸⁰. Lo anterior lógicamente ha dificultado aunque no imposibilitado su estudio. Ahora bien, es más que seguro que no pocos investigadores desistieron en su día de iniciar líneas de investigación al respecto. En cualquier caso, tal política ha conllevado otro riesgo palpable: pues los estudios académicos que se han llevado a cabo – y no sólo realizados por historiadores profesionales– han terminado por abordar esta misma historia del socialismo durante el último tercio del siglo XX, sin referencias documentales que ayudarán a entender y explicar determinados acontecimientos históricos claves.

Estamos ante un claro problema de voluntad política. ¿Por qué? En verdad, la razón o razones se desconocen. Nunca ha habido explicaciones oficiosas al respecto, más allá de que con el tiempo se pondrá a disposición del investigador tal documentación ante cada consulta periódica. Se tiene, por lo demás, constancia a través de una serie de testimonios personales⁵⁸¹, de la localización e inventariado de la documentación socialista durante la transición y la década de los ochenta en una nave situada en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿por qué seguir retrasando su incorporación al rico archivo y biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, cuando tendrían que ser los primeros interesados en dar a conocer la misma? Se pretende, acaso, con tal política, ¿desanimar las investigaciones al respecto? Se tiene por objetivo, ¿seguir fomentando una historia oficial/militante desde una óptica patrimonialista de la documentación?

De hecho, no creemos que tal actitud obedezca a cuestiones de vulgares “secretismos”. Pues acaso, y nos volvemos a interrogar, ¿qué tipo de documentación puede seguir siendo sensible o reservada tras tantos años? A excepción de las series documentales relacionadas con las “Finanzas” o de “Control y Garantías” –por cierto, a disposición del investigador en otros casos archivos del movimiento obrero– probablemente ninguna de las que en el futuro se conozca –por más que su tiempo resultara ser “reservada” o “confidencial”– y que previamente no haya sido convenientemente “filtrada”, podrá llegar a generar mayores problemas y controversias. Y, sin embargo, las mismas ayudarían a clarificar –y por tanto a entender mejor las razones políticas que impulsaron a los socialistas en determinadas actuaciones– la hoy incompleta historia del PSOE en la década de los ochenta.

Pero es que resulta, además, que buena parte de la documentación tanto del CEF como de la CE, de sus respectivas Secretarías o los propios Boletines Internos del PSOE, hoy pueden ser consultados, sin ningún tipo de restricción, en el Archivo Histórico de la Fundación Francisco Largo Caballero, por más que los papeles allí depositados resulten a veces incompletos y fragmentados. También la posible documentación que se ponga a disposición un día, lleva años siendo consultable a través de la prensa, a través de monografías e incluso a través de libros biográficos y de memorias políticas. ¿Hasta cuándo esta anomalía que dificulta –aunque no impide, insistimos– el proceso de normalización historiográfica en torno a la historia del socialismo español?

Sea cual sea la respuesta, existe en principio una fecha límite, establecida en el artículo 49.3 de la Ley 16/1985, que en el peor de los casos nos llevaría a esperar entre diez y veinte años más. Paciencia y tenacidad no suelen faltar en el gremio de historiadores.

⁵⁸⁰ Véase: www.fpabloiglesias.es.

⁵⁸¹ A.G. (mayo 2011), J. B. M. (junio 2011) y V. M. (junio 2011).

«Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado».

Sin embargo, y más allá de esta desoladora radiografía de la actual situación del sistema archivístico español, tras tantos años investigando, somos de la fundada opinión que cuando por fin se tenga acceso a la documentación “inédita” institucional-administrativa de la época socialista que llegue a manos del investigador; a buen seguro, la misma no deparará grandes sorpresas ni muchos menos modificará a grandes trazos las percepciones generales de este tiempo. A lo sumo ayudará a introducir matices sobre aspectos concretos o cuestiones menos estudiadas. Una convicción sustentada, primero, por la amplia bibliografía que ya se ha citado anteriormente, así como por lo aportado por tantos testimonios y protagonistas directos de aquellos años. Ello teniendo también presente todo el inabarcable flujo informativo que se conocería durante aquellos años a través de la prensa diaria, y que pese a sus evidente problemática en no pocos casos, constituye una gran base de datos de un valor incalculable. En tercer lugar, y volviendo a bajar al campo de las realidades y de los hechos mismos, esta opinión también se fundamenta por la considerable cantidad de *papeles* que ya están disponibles en los principales archivos del movimiento obrero y de otras organizaciones políticas, y que por sí mismos presentan un corpus documental lo suficientemente consistente, para investigar tal época histórica con las mínimas garantías.

En resumen, y volviendo a la advertencia de Edward Carr acerca de la marcada tendencia por parte de los historiadores de convertir cierta documentación en meros “fetiches”; lo cierto es que el futuro acceso a la documentación administrativa o la que ponga en su día a disposición la Fundación Pablo Iglesias, no asegura –ni mucho menos– que a partir de ese momento los investigadores podamos afrontar la historia del socialismo español con todas las garantías. Siempre faltará algún tipo de documentación por conocerse, cuando esta no se haya destruido u olvidado en alguna repisa de los archivos. Llegado tal día, el proceso de normalización comenzará y la primera de nuestras tareas será interrogarnos por la fiabilidad y validez de las mismas, tal y como venimos haciendo desde hace años con toda y cada una de la documentación ya disponible.

2.3.1.1. Fuentes primarias

A continuación se presentan tanto los archivos y centros de documentación que sirvieron de soporte de cara a nuestra investigación, junto con un pequeño balance sobre las principales series documentales o bibliografía que se localizaron en los mismos.

a) Archivo Histórico de la Fundación Francisco Largo Caballero

Como ya se ha hecho mención en más de una ocasión, el AHFFLC se convertiría, a la postre, en nuestra principal fuente de información documental⁵⁸². No sólo por el hecho de poder acceder a buena parte de la documentación del PSOE –principalmente los papeles generados por la CEC como del CE– sino ya que nos abriría la posibilidad de consultar –a través de las más inesperadas vías– abundantes papeles del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía en su día considerados “confidenciales” o “reservados”, así como todo tipo de cartas personales entre los dirigentes socialistas –tanto del PSOE como de la UGT– y los propios miembros del Gobierno. *Papeles* todos ellos de una importancia histórica central como trataremos de evidenciar.

⁵⁸² Consúltense sus principales fondos en la siguiente dirección electrónica: archivos.ugt.es. Y asimismo: FRANCO, Nuria, RAMOS, Ester y RODRÍGUEZ, Jesús, *Guía General del Archivo y la Biblioteca de la Fundación Francisco Largo Caballero*, 3ª ed., Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2004.

Pero también, se ha de destacar la valía del AHFFLC por su constante labor archivística de poner todos sus fondos contemporáneos a disposición del investigador. Así, a pesar de su amplio desconocimiento, el mero hecho de consultar los libros de actas de la Comisión Ejecutiva Confederal entre 1976 a 1994, proporcionaría una visión única. Reunión tras reunión se visualiza la gestión cotidiana de la UGT y cuyo posible paralelismo con otro fondo –que conozcamos– no tiene referencia similar. Todo ello, a pesar, de los evidentes “vacíos” –filtrados o no previamente, se desconoce– que se producen en los citados libros de actas, y que coinciden, en términos generales, con acontecimientos históricos claves.

Igualmente de una extraordinaria importancia ha sido acceder –sin ningún tipo de límite– a los expedientes completos de los Comités Confederales entre 1979 a 1992, así como a todas las series documentales de los Congresos Confederales. En los mismos, no sólo se pueden observar las grandes líneas de actuación estratégica, sino leer desde la situación financiera, pasando por la Comisión de Garantías y Control, hasta los informes de la Secretaría de Organización o de Imagen.

A ello se suma toda una serie de fondos relacionados con las diferentes Secretarías –principalmente de “Organización”, “Acción Sindical”, “Acción Institucional”, “Acción Reivindicativa”, “Formación”– o el propio “Departamento de Juventud” y lógicamente el Gabinete Técnico Confederal y las publicaciones del Instituto Sindical de Estudios. Ya en estos últimos años también ha estado a disposición Fondos Personales de la transcendencia de los de José María Zufiaur, Antón Saracibar o Jerónimo Saavedra. Es a través de estos mismos en donde se han podido localizar los siempre tan buscados *papeles* por parte de los principales protagonistas sindicales de este país durante la década de los ochenta y noventa.

Por último, resaltar tanto las publicaciones periódicas –principalmente *Unión*, a partir de 1983– las monografías y otros estudios así como el reciente fondo del llamado “Archivo oral del sindicalismo socialista” con decenas de entrevistas a disposición del investigador⁵⁸³.

b) Archivo historia del Trabajo / Fundación 1º de Mayo

Estamos aquí ante un ejemplo de una decidida voluntad política de poner a disposición del investigador y del ciudadano toda la documentación generada por las Comisiones Obreras. Bajo la dirección de José Babiano se ha desarrollado un trabajo archivístico riguroso y prácticamente único dentro de los archivos del movimiento obrero. La posibilidad de acceder en línea a su amplio “Cuadro de clasificación e instrumento de acceso en formato digital” resultaría de enorme ayuda. Un cuadro en donde además de describir cada uno de los fondos, se desarrolla una historia institucional de cada órgano de gobierno correspondiente así como se especifica tanto el Área de Contexto así como el Área de Contenido y Estructura⁵⁸⁴.

En concreto, para la presente investigación se consultarían, en primer lugar, las series del Secretariado Confederal (1976-1991), del Consejo Confederal (1978-1995), de la Secretaría General Confederal (1969-1990), además de los Congresos Confederales. Sucede aquí al igual que viéramos ya con la documentación similar de UGT, que las mismas brindan una visión global a la par que concreta en torno a la evolución política y estratégica de CCOO. Al mismo tiempo, se trabajaría con los fondos de la Secretaría Confederal de Juventud (1977-1990), Secretaría Confederal de Prensa (1976-1980) así como con la documentación del Gabinete Técnico Confederal (1977-1986).

De la misma forma, se tendría acceso tanto de la Gaceta de Derecho Social (1976-1980) como de Gaceta Sindical (1980-1993) y a la colección “Biografías obreras y militancia sindical en CCOO”, a partir de donde se emplearían para la presente investigación los testimonios de Julián Ariza, Marcelino Camacho, Salve Elvira y de Adolfo Piñedo⁵⁸⁵.

⁵⁸³ Véanse un listado de las mismas en: www.ugt.es/fflc/hemeroteca/hemeroteca01.htm.

⁵⁸⁴ www.1mayo.org.

⁵⁸⁵ www.archivoshistoricos.ccoo.es/listadoaht.pdf.

c) Archivo Histórico de la Fundación Pablo Iglesias

Más allá de la situación previamente descrita, tanto en el Archivo como principalmente en su Biblioteca, se consultaron, en primer lugar, la documentación relativa a los Congresos Federales. Aunque se tratan de series incompletas, al menos, se accedería a los informes de gestión, las ponencias y la publicación de las actas. Como también se consultaría las escasas –y no completas, de nuevo– actas disponibles de las reuniones de la CEF del PSOE.

Junto al llamado Archivo del Exilio, se accedería también –aunque de forma fragmentada y parcial– a la escasa documentación relativa a la Secretaría de Organización Federal, alguna que otro acta del Grupo Federal de Economistas del PSOE, de la Secretaría de Formación Federal o del Comité Electoral en relación a las elecciones de 1979 y 1982, así como una serie limitada de informes de la Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Económicos. Por lo demás, se consultaría la mayor parte de las publicaciones partidistas del PSOE y también a sus programas electorales en versión abreviada.

También destacar que en estos últimos años se ha colgado en red la digitalización de *El Socialista* desde 1866 hasta 2006.

d) Otros archivos y centros de documentación

A los ya citados archivos históricos, también se trabajaría en otros tantos así como en diversos centros de documentación, bibliotecas y hemerotecas. Dada su menor importancia cualitativa, tan sólo se procede a hacer un listado minucioso. En el caso, de los archivos se trabajaría también en el Archivo Histórico del Partido Comunista de España, cuya documentación para este periodo llega a lo sumo hasta 1982. En relación a centros de documentación, se investigaría en el del Instituto de la Juventud, en el del Consejo de la Juventud y en el de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Este último hoy día constituye una de las principales referencias para cualquier investigador interesado en el movimiento obrero y sindical.

En lo que respecta a las bibliotecas además de las diferentes facultades de la Universidad Complutense de Madrid así como en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de cara a consultar un significativo número de tesis doctorales; se trabajaría en la Biblioteca Nacional, en la biblioteca central del hoy Ministerio de Empleo y del Ministerio de Economía, en la biblioteca del Consejo Económico y Social, en la biblioteca del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en la biblioteca del Instituto Nacional de Estadística, en la biblioteca de la Fundación de Investigaciones Marxistas, así como en las bibliotecas del Congreso de los Diputados y del Senado, entre otras. A ello se sumaría, finalmente, el trabajo en la hemeroteca del Centro Cultural Conde Duque.

2.3.1.2. Fuentes secundarias

Si hasta el momento se ha llevado aquí un estado de la cuestión en torno a las principales referencias bibliográficas –en forma de monografías, libros colectivos, documentos de trabajo y en menor medida de artículos científicos– así como en relación a las fuentes primarias, corresponde ahora detenernos en las principales fuentes secundarias. Fuentes que dado la temática y el tiempo histórico en el que se inscribe esta investigación han resultado esenciales. En concreto, nos referimos tanto a las procedentes de las revistas científicas como de la prensa diaria.

En el primer caso, se cuenta con una ingente cantidad de revistas así como los conocidos *Working Papers* –o mejor dicho, “Documentos de Trabajo– de diferentes fundaciones y centros de investigación que, desde finales de los setenta hasta el presente, han tratado numerosas cuestiones relacionadas con la época socialista. De nuevo, el principal obstáculo resulta ser el de la especialización científica. Pocos casos existen de revistas de carácter interdisciplinar. Vaya también por delante que en la mayor parte de los casos los

criterios de calidad de las revistas científicas en castellano, se han ido imponiendo muy lentamente.

A continuación se señalan por temáticas las principales revistas científicas empleadas. En cada caso, se procedería al correspondiente vaciado bibliográfico completo de cada una de ellas. En primer lugar, en relación a las relacionadas con la historia contemporánea se emplearon las siguientes: *Alcores. Revista de Historia Contemporánea*, *Aportes. Revista de Historia Contemporánea*, *Aula historia social*, *Ayer*, *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea*, *Estudios de Historia Social*, *Historia Actual Online*, *Historia, Antropología y Fuentes* –así como los números de su antecesora, *Historia y Fuente Oral–Historia Contemporánea*, *Hispania: Revista Española de Historia*, *Hispania Nova*, *Historia del Presente*, *Historia Social*, *Pasado y Memoria: Revista de Historia Contemporánea*, *Studia Historica*, *Revista de Historiografía*, *Revista HMiC: història moderna i contemporània*, *XIX y Veinte. Revista de Historia y Pensamiento Contemporáneo o Trocadero*. En estos dos últimos años, han nacido dos proyectos editoriales a tener muy presentes en adelante: *Segle XX: Revista Catalana d'Història y Historia*, *Trabajo y Sociedad*, vinculadas a la Fundació Cipriano García y la Fundación 1º de Mayo, respectivamente. De nueva aparición también, aunque desde otros intereses, es, *Historiografías: revista de historia y teoría*. A ellas han de sumarse destacadas revistas anglosajonas como, *Social History*, *Journal of Social History*, *Past & Present*, *Journal of Modern History*, *History and Theory*, *International Journal of Iberian Studies*, *Journalism History*, *History of historiography*, *History Today*. En francés, la propia *Annales*, *histoire y sciences sociales* y *Cahier d'histoire immediate*. Y en italiano: *Spagna contemporanea*.

A nivel de Derecho del Trabajo fundamentales han sido las siguientes: *Actualidad Laboral*, *Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo*, *Cuadernos de Historia del Derecho*, *Documentación Laboral*, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, *Relaciones Laborales: Revista Crítica de teoría y práctica*, *Revista de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, *Tribuna Social*, *Proyecto social: revista de relaciones laborales*, *Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, *Tribuna Social: revista de Seguridad Social y Laboral* o la propia *Revista de Derecho Social*. A nivel de jurisprudencia: *Aranzadi Social y Información Laboral. Jurisprudencia*. En otros idiomas: *American Law and Economics Review*, *Labovoro e diritto* o *Common market law review*, *International Labor and Working Class*,

A las anteriores habría que sumar una serie de revistas entre el derecho del trabajo y las relaciones laborales. Primero, las editadas desde principios de los años ochenta por el Ministerio de Trabajo: *Revista de Trabajo* (1980-1990), *Revista de Trabajo y Seguridad Social* (1991-1996), *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales* (1997), a partir de entonces con varios cambios de nominación. Aquí también habría que reseñar otras revistas promovidas por la misma institución como en el *Economía y Sociología* (1988-1995), una de las más importantes a pesar de su escaso trayecto.

Desde una perspectiva a medio camino entre el derecho del trabajo y las relaciones laborales, se tiene que mencionar las siguientes: *Lan harremanak: Revista de relaciones laborales*, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid*, *Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas*, *Cuadernos de Realidades Sociales*, *Cuadernos de Trabajo Social*, *Revista de Treball*, *Economia i Societat*, *Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo*. Un apartado en donde destaca *Sociología del Trabajo* y más recientemente, *Revista Crítica de la Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social*. Y a nivel internacional, primero, la *Revista Internacional del Trabajo* de la OIT. Procedente de Argentina reseñar: *Trabajo y Sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas en sociedades segmentadas*. En italiano: *Economia & Lavoro: rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali* y *Sociologia del lavoro*. Revistas de impacto norteamericanas o inglesas: *European Journal of Political Research*, *Industrial and Labour Relations* y *European Journal of Industrial Relations Review*.

A ello se sumarían un amplio conjunto de las denominadas *revistas sociales*. Ejemplo en no pocos casos de interdisciplinariedad: *Documentación Social*, *Sociedad y Utopía*, *Quaderns de Ciències Socials*, *Estudios Sociales*. *Revista de investigación científica*, *L'Avenç*, *Papeles de la FIM*, *Sin Permiso*, *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, *Apuntes: Revista de Ciencias Sociales*, *Debats*, *Acciones e investigaciones sociales*, *Entelequia: revista interdisciplinar*, *Rescaldos: revista de diálogo social*, *Mientras Tanto*, *El Viejo Topo*, *Viento del Sur*, o *New Left Review (en español)*. A lo que debería sumarse la potente revista argentina, *Argumentos. Revista de Crítica Social* o la italiana, *Critica marxista: analisi e contributi per ripensare la sinistra*. Así como las ya desaparecidas –y siempre recordadas– *Materiales: crítica de la cultura* o *Ajoblanco*⁵⁸⁶.

Otra importante fuente de referencias la constituirían las más relevantes revistas de sociología y de ciencias políticas. De hecho, en no pocas ocasiones ha confluído ambos campos en este tipo de publicaciones: *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* (REIS), *Papers: Revista de Sociología*, *Revista Española de Sociología* (RES) o *Revista Internacional de Sociología* o *Praxis sociológica*. Así como: *Sociological Research*. E igualmente desde las ciencias políticas: *Revista Española de Ciencia Política*, *Revista de Estudios Políticos*, *Política y Sociedad*, *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, *Inguruak: Revista vasca de sociología y ciencia política*, *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas* (RIPS), o las ya también desaparecidas: *Revista de Economía Política* o *Revista de Política Social*, publicadas en su día por el hoy Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: A nivel internacional: *Electoral Studies: An international Journal*.

Además de *Papeles de Economía Española* o *Economistas* en materia tanto de ciencias económicas como de historia económica, se ha trabajado con el siguiente repertorio: *Boletín de Estudios Económicos*, *Cauces: Cuadernos del Consejo Económico y Social*, *Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales*, *Cuadernos de Información Económica*, *Investigaciones Económicas*, *Moneda y Crédito*, *Panorama Social*, *Política Económica*, *Revista de Economía Laboral*, *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, *Revista Española de Economía* y su continuación en, *Spanish Economic Review*. Y de forma destacada *Desarrollo Económico* y *Revista de Economía Crítica*. A las anteriores habría que sumar *Hacienda Pública* y *Presupuesto y Gasto Público* del Ministerio de Hacienda. Y por otra parte, *Boletín Económico de ICE. Información Comercial Española* y *Cuadernos Económicos del ICE* del Ministerio de Industria. En cuanto a revistas de historia económica: *Estudios de Historia Económica*, *Revista de Historia Industrial*, *Revista de Economía Aplicada e Historia Económica*, *Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic* e *Investigaciones de historia Económica: Revista de la Asociación Española de Historia Económica*. A nivel internacional: *Cambridge Journal of Economics*, *European Journal of Industrial Relations*, *Historical Studies in Industrial Relations*, *The Economic Journal*, *Journal of Political Economy*. Y en francés: *Annales d'Economie et de Statistique* así como la pionera, *Revue d'économie politique*.

En lo que respecta a la sociología de la juventud, en primer lugar, debe hacerse mención a las revistas impulsadas y editadas desde el propio INJUVE –así como por sus organismos que le antecedieron– desde principios de la década de los años ochenta: *De Juventud: revista de estudios e investigación* (1980-1983, editada desde la Dirección General de la Juventud y Promoción Social) y la ya citada en varias ocasiones, *Revista de Estudios de Juventud* (1984-...). A lo que habría que sumar, *Revista del Instituto de la Juventud* (1965-1978) editada en su día por los entonces Ministerio de Cultura y Instituto de la Juventud. A las citadas habría que añadir también las del Consejo de Juventud: *Revista CJE* y *OBJOVEM (Observatorio Joven de Empleo)*. Incluyéndose igualmente: *Papers de joventud*. E igualmente las revistas de referencia anglosajonas, *Journal of Adolescence* y *Youth and Society*.

⁵⁸⁶ Junto con las referencias previamente citadas, véase también, PECOURT, Juan, *Los intelectuales y la transición política: un estudio del campo de las revistas políticas en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008.

Asimismo se trabajaría con detenimiento en el conjunto de las revistas del entorno socialista. Sobre su importancia para nuestro tiempo histórico ya se ha dejado la suficiente constancia. Conjunto de revistas por donde han pasado los principales especialistas de las diferentes ramas del conocimiento social, laboral, jurídico y económico. Nos referimos en concreto a las siguientes: *Sistema* (1973-...), *Zona Abierta* (1972-2006), *Leviatán. Revista de hechos e ideas* (1979-2011), *Letra Internacional* (1986-...) y *Temas para el debate* (1994-...).

Por lo demás, ya se hizo mención como en estos últimos años han ido cobrando fuerza los denominados *Working Papers* procedentes de diferentes instituciones y centros de estudio. Todo ello con una característica: en su mayor parte se encuentran en formato digital, lo que sin duda ha ayudado tanto a su acceso como difusión. Entre se han empleado: *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, *Documentos de Trabajo CSIC. Unidad de Políticas Comparadas*, *Documentos de Trabajo. Laboratorio de Alternativas*, *Documentos de Trabajo del Servicio de Estudios del Banco de España*, *Documentos de Trabajo FEDEA*...

Por último, se emplearían diversas revistas de difícil ubicación: *Claves de Razón Práctica*, *Revista de Occidente* o *Pasajes. Revista de pensamiento contemporáneo*.

«La comunicación tiene de particular que casi siempre es una herramienta y a la vez una ideología».

Ignacio RAMONET⁵⁸⁷.

A la hora de acercarse a la prensa diaria el historiador o el científico han de proceder con todas las cautelas necesarias y posibles. No cabe una perspectiva distante o neutral. En el tiempo histórico en que se inserta esta tesis –a grandes trazos, entre 1972/1976 a 1996– no era siquiera imaginable lo que años más tarde describiría magistralmente Manuel Castells sobre la *sociedad de la información*⁵⁸⁸. En tiempos de una limitada pluralidad informativa –ningún medio de comunicación crítico y/o alternativo sobreviviría durante estas mismas décadas⁵⁸⁹– y en donde la principal fuente de información la constituirían los medios de comunicación diaria, la prensa –tal y como había sucedido desde su origen– jugaría un rol clave en la conformación de consensos a la par que disensos políticos, sociales pero sobre todo económicos. A saber, estamos frente al cuarto poder⁵⁹⁰.

Pese a lo anterior –por más que resulte obvio e incluso banal decirlo– de forma mayoritaria se ha empleado a la prensa en no pocas ocasiones sin las precauciones debidas, pero sobre todo sin aparato crítico. A buen seguro, se dio por obvio lo que quizás no resultaba tan obvio. Lo anterior, deviene en central por el papel político e informativo –por este orden– que

⁵⁸⁷ AGUIRRE, Mariano, “La situación actual revela una crisis de representación política. Entrevista a Ignacio Ramonet”, *Revista Internacional de Filosofía Política*, nº 12, (1998), p. 179.

⁵⁸⁸ CASTELLS, Manuel, *La era de la información*, 3ª ed., III vols., Madrid, Alianza Editorial, 1997/1998.

⁵⁸⁹ El caso más significativo sería el de *Mundo Obrero* quien durante 1978 a 1980 aparecería en formato diario. Un proyecto editorial que fracasaría estrepitosamente, tanto a nivel político como económico. Véase al respecto, VEGA, Pedro y ERROTETA, Peru, *Los herejes del PCE*, Barcelona, Planeta, 1982.

⁵⁹⁰ Entre otros libros al respecto: REIG, Ramón, *Medios de comunicación y poder en España: prensa, radio, televisión y mundo editorial*, Barcelona, Paidós, 1998; y, COTARELO, Ramón y CUEVAS, Juan Carlos (comps.), *El cuarto poder: medios de comunicación y legitimación democrática en España*, Medilla, UNED-Melilla / Servicio de Publicaciones, 1998. Así como el trabajo de principios de los años ochenta de, BUSTAMANTE RAMÍREZ, Enrique, *Los amos de la información en España*, Madrid, Akal, 1982.

decidirán jugar los dos principales medios aquí empleados durante la época socialista: *El País*⁵⁹¹ y el *ABC*⁵⁹² y en menor medida *Diario 16*. Más allá de sus respectivas tiradas, ambos medios se implicarían a fondo en los principales acontecimientos de estos años, en una perspectiva que en más de un caso adquiriría un *tono militante*, aunque guardando las distancias con la propia prensa partidista.

Por ejemplo, en el caso de *ABC* esta perspectiva se hizo más que evidente en la campaña electoral de 1982. Ya en su día describimos y examinamos su estrategia como la “campaña del miedo” del *ABC*, apoyada política y económicamente por los principales poderes fácticos con la patronal CEOE por delante⁵⁹³. Otro tanto sucedería durante aquellos difíciles primeros meses de 1984, en donde el diario conversador-monárquico dedicaría numerosas portadas y editoriales, a presentar lo que denominaría como el contexto de emergencia nacional en medio de una potente conflictividad obrera. Por su parte, *El País* –el “intelectual colectivo” de la nación en palabras de José Luis López Aranguren⁵⁹⁴– no sólo actuaría como el vocero del socialismo antes y después de 1982, sino ya en tiempos socialistas establecería una particular *correa de transmisión* con el Gobierno. No sólo por la línea informativa pro-gubernamental, apoyada en portadas y editoriales cuando más urgente resultaba como en los casos de represión contra el movimiento obrero; sino empleando sus páginas del “necesario enlace”, a través de filtraciones desde “arriba”, para desacreditar a las Comisiones Obreras en uno momento político extremadamente complicado. Por ejemplo la campaña desatada en octubre de 1984 contra el Secretario General de CCOO, Marcelino Camacho, tras la negativa del sindicato de mayoría comunista a firmar el AES, resulta del todo clarificadora. Se podían citar otros tantos casos conocidos como desconocidos.

No obstante, como se ha insistido y remarcado, resulta que el acceso y consulta a los citados medios –todavía más desde que están en “línea”– se hacen imprescindibles. No sólo por la propia información allí contenida que nos ayuda a dibujar el día a día, las interioridades y contradicciones de un proceso de cambio político pero también social, sino por la ingente cantidad de datos, informaciones y pistas que allí aparecen. De hecho, una vez agudizado el *sentido crítico*, las noticias, reportajes, editoriales –de forma implícita antes que explícita– presentan un innumerable cuadro de *factores* políticos, sociales, económicos pero también de tipo personal cuando no partidista, que ayudan a explicar los trasfondos de acontecimientos claves, y que sin esta misma perspectiva suelen quedar desdibujados o al menos no debidamente contextualizados. En suma, a falta de que los historiadores dispongan de la documentación de carácter público/institucional y partidista que está por llegar, la *prensa* suple –con creces– este mismo déficit.

⁵⁹¹ En primer lugar, consúltese el trabajo de la periodista y la historiadora –respectivamente– SEOANE, M^a Cruz y SUEIRO, Susana, *Una historia de El País y del Grupo Prisa*, Barcelona, Plaza & Janés, 2004. Tiempo atrás, CRUZ RUIZ, Juan, *Una memoria de ‘El País’*, Barcelona, Plaza & Janés, 1996. E igualmente, CHAPUT, Marie-Claude, “Del «parlamento de papel» (1962-1982) al periódico de referencia «El País» (1976-...)” en CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Sociedad de masas, medios de comunicación y opinión pública*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2008, pp. 297-316.

⁵⁹² En primer lugar consúltese el trabajo de, OLMOS, Víctor, *Historia del ABC*, Barcelona, Plaza & Janés, 2002. Y asimismo pero ya en un tono claramente hagiográfico: PÉREZ MATEOS, Juan Antonio, *ABC, historia íntima del diario: cien años de ‘un vicio nacional’*, Madrid, Libro-Hobby, 2002; y, unos años antes, IGLESIAS, Francisco, *Historia de una empresa periodística. Prensa Española: editora de ‘ABC’ y ‘Blanco Negro’ (1891-1978)*, Madrid, Prensa Española, 1980.

⁵⁹³ GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La campaña del miedo: el papel de ABC en las elecciones de octubre de 1982”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, n^o 16, (2004), pp. 371-398.

⁵⁹⁴ LÓPEZ ARANGUREN, José Luis, “*El País* como empresa e «intelectual colectivo»”, *El País*, 7 de junio de 1981.

Para nuestro estudio de caso desarrollado en el capítulo 9, la principal fuente la ha constituido *El País* como el *ABC*. Especialmente importante ha resultado *El País* tanto por su papel como “correa de transmisión” como por el singular papel político que decidió jugar. Asimismo cabe recordar que desde su fundación hasta principios de los años noventa – precisamente coincidiendo con el declive político del movimiento sindical– el citado diario tendría siempre un amplio espacio reservado a la información laboral. De esta forma, sus crónicas laborales diarias constituyen un singular memorándum de la relaciones capital-trabajo. A ello se sumaría, además, la amplia nómina de periodistas especializados al respecto. Una nómina encabezada por Rodolfo Serrano, quien desde su profundo conocimiento y sus contactos partidistas, sindicales y gubernamentales, se convertiría, al mismo tiempo, en el cronista mejor informado de este tiempo⁵⁹⁵. Sin embargo, el propio Serrano actuaría en más de una ocasión, desde esta misma privilegiada posición, como un actor político antes que como un informador, como tiempo tendremos de observar.

Recorrer hoy la intrahistoria de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 así como de la negociación del Acuerdo Económico y Social, no es posible ni viable sin la prensa. Ello pese a la existencia de determinados vacíos, de concretos “silencios” –tanto o más importante que los “no silencios”– y del claro sesgo informativo y editorial. Es por parte de ambos medios de comunicación, el mejor camino en donde seguir las reuniones, los desencuentros, las rupturas de todo proceso negociador, pero también la ida y venida de las filtraciones –así como de sus *porqués*– de las reuniones teóricamente secretas pero relevadas al poco tiempo a la propia prensa, por intereses o por errores propios de los negociadores.

Precisamente, la negociación del RET’84 y del AES se sustentaría a través de un proceso opaco en donde el secretismo y la exclusión de facto de CCOO, resultarían claves. A buen seguro, nunca conoceremos todos y cada uno de los detalles de aquellas reuniones descritas por la prensa en un estilo más propio de una novela policiaca o un guión televisivo, tal y como por ejemplo sucedería años antes durante la negociación del ANE con todos sus “pactos secretos” sobre el patrimonio sindical y la contratación temporal. Detalles, de nuevo, que si algún día se revelan –lo cual no parece probable dicho sea todo– podrán modificar alguna parte menor del relato, pero no el contexto general a la luz de lo que se quiso o no se quiso filtrar en su momento. Lo cierto es cuando con el tiempo se han relevado estos *detalles incómodos*, como recientemente ha hecho el veterano periodista económico Mariano Guindal en su obra *El declive de los dioses*⁵⁹⁶ –quien junto al ya citado Rodolfo Serrano, constituyeron dos de las voces periodísticas más influyentes durante los gobiernos socialistas– la imagen que se ha transmitido ha terminado por desmitificar tanto secretismo. *Misérias personales* aparte e *intereses políticos* poco confesables, el glosado modelo de concertación social se nos termina presentando antes que como una negociación como un intercambio de favores, de contra-favores, de partidas y contrapartidas, que previamente limadas saldrían publicadas en el BOE. Lo que en cualquier caso evidencia –y he aquí lo realmente importante– las dificultades y obstáculos de todo tipo que conllevaría la flexibilización del ordenamiento laboral.

Junto con la prensa diaria también resultaría clave el acceso de la prensa económica⁵⁹⁷. Principalmente se han utilizado *Cinco Días* (1980-...) del Grupo PRISA y *Expansión* (1986-...)

⁵⁹⁵ Además del ya citado libro, GUINDAL, Mariano y SERRANO, Rodolfo, *La otra transición...*, *op.cit.*, véase también, id., *Un oficio de fracasados: libelo pro y contra el periodismo*, [Córdoba], Berenice, 2006.

⁵⁹⁶ GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.* Consúltese, por ejemplo, la descripción de cómo transcurrieron las negociaciones del ANE de 1981, en donde más allá de detalles personales y otros de tipo ‘escabroso’, retrata a la perfección la alta tensión que conllevó cada paso flexibilizador [“El pacto del miedo”, pp. 180-186].

⁵⁹⁷ Desde una perspectiva histórica poco frecuente por la propia temática elegida: CHARTIER, Chantal, “Les enjeux de la nouvelle presse économique de l’Espagne des années 1980”, *Cahiers de civilisation espagnole contemporaine*, n° 8, (2011). Por otro lado, nos remitimos al reciente como clarificador libro de, FERRER CASTELLÓ, Evaristo, *Cómo leer la prensa económica: indicadores*

del Grupo Recoletos, hoy perteneciente a Unidad Editorial. Así como también devendría en básica la revista de información general *Cambio 16* (1971-...). A los anteriores medios, se sumaría la consulta de la literatura partidista: *El Socialista*, *Unión*, *Gaceta Sindical* y *Mundo Obrero*.

Ya en este último tiempo el exponencial crecimiento de la red de redes, ha conllevado la publicación en línea de importantes fondos de prensa. Nos referiremos a dos: primero, el “Archivo Hemerográfico del Profesor Juan J. Linz: La transición española en la prensa (1973-1986)”, impulsado por la Fundación Juan March⁵⁹⁸; y en segundo término, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del antiguo Ministerio de Cultura⁵⁹⁹.

Por último, y a pesar de las evidentes dificultades que se sigue teniendo para historiar a la clase empresarial española –al carecer de un centro de documentación o archivo propiamente dicho– se consultaría tanto los *Boletines de la CEOE* como los *Boletines del Círculo de Empresarios*⁶⁰⁰.

2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica

«La estadística es una ciencia que demuestra que si me vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno».

George BERNARD SHAW.

«En resumen: el cacareado *nuevo milagro español* tiene una estructura económica más frágil de lo que dice el optimismo oficial, y los *pies de barro*.

[...].

Conviene recordar que con ayuda de la reforma estadística del paro registrado de 1985 se excluye hoy a 868.200 personas. Con la encuesta de población activa también se ha recurrido a criterios tan discutibles como considerar no parada a aquella persona que haya trabajado una hora en la última semana. A pesar de todo el maquillaje estadístico, España, con una tasa de actividad nueve puntos inferior a la europea, tiene doble tasa de paro (21%) que la media de la CE (10%)».

Agustín MORENO, *El Gobierno en el país de las maravillas*⁶⁰¹.

Sí en una faceta destacarían los socialistas sería en el “arte de contar”. Un *especializado arte* que tiene decenios de antigüedad en nuestras sociedades contemporáneas. Ya en los años sesenta del siglo XX Darrell Huff e Irving Geis en *Cómo mentir con estadísticas* se aproximarían en un tono irónico a la par que crítico a esta misma cuestión:

«El lenguaje secreto de las estadísticas, tan atrayente a una cultura que se apoya en los hechos, se emplea para causar sensación, deformar, confundir y simplificar en demasía. Los

macroeconómicos y mercados financieros, Alicante / San Vicente [del Raspeig], Fundesem Business School / Alicante: Club Universitario, 2010. También: HERMIDA, José M., *Cómo leer y entender la prensa económica*, Madrid, Temas de Hoy, 1993. E igualmente, ARRESE, Ángel, “Prensa económica y financiera en España: apuntes para una historia reciente” en FERNÁNDEZ SANZ, Juan José (coord.), *Prensa especializada actual: doce calas*, Madrid, McGraw Hill, 2008, pp. 1-36; y en tono crítico, BACHMANN, Ingrid, “Estudio en la prensa económica: la contaminación del discurso periodístico”, *Cuadernos de Información*, n° 18, (2005); y, SAMPER, Eduardo, “Prensa económica. Los apóstoles de una nueva religión”, *Ipmark: Información de publicidad y marketing*, n° 556, (2001), p. 22.

⁵⁹⁸ www.march.es/ceacs/proyectos/linz.

⁵⁹⁹ prensahistorica.mcu.es.

⁶⁰⁰ También patrocinado por el Círculo de Empresarios sería de la serie publicaciones de monografías que llevarían por título el *Libro Marrón*.

⁶⁰¹ MORENO, Agustín, “El Gobierno en el país de las maravillas”, *El País*, 11 de agosto de 1988.

métodos y los términos estadísticos son necesarios para informar sobre los datos masivos de las tendencias sociales y económicas, las situaciones de los negocios, las encuestas de ‘opinión’ y los censos; pero sin escritores que utilicen las palabras con honradez y precisión y sin lectores que sepan lo que significan, el resultado no es más que pura semántica sin sentido alguno»⁶⁰².

Avisan allí también de la generalizada tendencia de las instituciones a manipular descaradamente las mismas:

«Cuando compruebe una estadística, busque la posible tendencia que alguien haya introducido en las cifras totales o en las conclusiones.

Con frecuencia se da a conocer una cosa en lugar de otra»⁶⁰³.

Por tanto, y tal como hemos visto con la prensa pero también con otras tantas fuentes de información, a las estadísticas se debe aproximarse ya no sólo con las precauciones debidas, sino con un potente y refinado apartado crítico⁶⁰⁴. El riesgo de caer en un mero “cuantitativismo ingenuo” que denunciará en su día el Colectivo IOE constituye una posibilidad real⁶⁰⁵.

Constituidas las propias estadísticas en las sociedades contemporáneas en herramientas de poder, con las que construir una realidad social concreta a la par que justificativa a posteriori de las acciones gubernamentales, forman a su vez parte de los propios mecanismos de dominación y consenso. ¿Resulta obvio lo anterior? No, pese a que en la propia Constitución en el “Título VIII. De la Organización Territorial del Estado” en su artículo 149.31 se indicara expresamente como: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Estadísticas para fines estatales”. De este modo, y aunque no han faltado los estudios de todo tipo que se hayan preguntado por la calidad, la fiabilidad y otras tantas cuestiones, rara ha sido la ocasión en que se haya indagado, precisamente, sobre este espinoso interrogante.

Es el Estado –desde una perspectiva de clase, tal y como se ha insistido en numerosas ocasiones– a través de sus organismos especializados quien diseña, configura y construye el aparato metodológico. Más allá de este claro *sesgo* de entrada, además cuenta con los instrumentos jurídicos y legislativos para modificar las mismas. No se dirá nada nuevo tampoco, cuando se afirma que la mayor parte de los cambios metodológicos en las principales estadísticas en España, siempre han tendido a ir en línea con determinados intereses políticos-económicos antes que con criterios relacionados con la siempre citada calidad y la fiabilidad. Tan sólo con la entrada primero en la CEE y posteriormente en la UE, y la adaptación de buena parte de la normativa a los criterios del EUROSTAT⁶⁰⁶ –y no toda cabría decir– así como las relacionadas con la OIT, los márgenes de actuación para tales modificaciones se reducirían considerablemente. Aunque no suele ser muy frecuente, se podría hablar también del claro desfase en el proceso de normalización pero también de democratización de esta poderosa

⁶⁰² HUFF, Darrel y GEIS, Irving, *Cómo mentir con estadísticas*, [Barcelona] Ares y Mares, 2011 [1965], pp. 6 y 7. En esta misma línea, consúltese también el trabajo de, BEST, Joel, *Uso y abuso de las estadísticas. La distorsión en la percepción pública de los problemas sociales y políticos*, Santiago de Chile, Cuatro Vientos, 2010.

⁶⁰³ HUFF, Darrel y GEIS, Irving, *Cómo mentir con..., op.cit.*, p. 170.

⁶⁰⁴ Junto con el manual de, MARTÍN GONZÁLEZ, Germán, *Introducción a la estadística*, 2ª ed., Valencia, Universidad Católica de Valencia ‘San Vicente Mártir’, 2009, véanse, primero, CARIDAD y OCERÍN, José Mª, *Estadística aplicada en ciencias sociales*, [Córdoba], Universidad de Córdoba. Departamento de Estadística, 2010; y, ALMAZÁN LLORENTE, Alejandro, *Análisis estadístico para la investigación social*, Madrid, Garceta / UNED, 2011. Y, por otro lado, BÁRCENA MARTÍN, Elena, *Introducción a la estadística para las relaciones laborales*, Málaga, Ágora [2007]; ÁLCALA, Ángel, *Estadística para relaciones laborales*, Salamanca, Hespérides [1999]; y concretamente, MONTERO LORENZO, J. Mª, *Estadística para las relaciones laborales*, 2ª ed., Madrid, AC, 2002.

⁶⁰⁵ COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de], *Condiciones de trabajo..., op.cit.*, p. 40.

⁶⁰⁶ Véase aquí, CANCHO, Nuria E., “La Encuesta de Población Activa adapta su metodología a la UE”, *Fuentes Estadísticas*, nº 62, (2002), p. 9.

herramienta política A lo que suma otra cruda realidad: la práctica inexistencia ya no sólo de lecturas críticas, sino de construcción de otras fuentes estadísticas alternativas más allá de las destinadas a “fines estatales”⁶⁰⁷.

Ahora bien, en la época de los gobiernos socialistas esta situación descrita alcanzaría altas cuotas. Gobernantes, técnicos pero también políticos se transformarían en consumados profesionales en leer o releer las estadísticas. Probablemente, aquella extendida especialización mucho tendría que ver con el predominio dentro y fuera del Ejecutivo de los tecnócratas liberales. Puesto en marcha el proyecto de modernización económica y social del país, a través de una lectura que interpretaba la economía antes que como opción política como ciencia prácticamente exacta, la presentación de sus resultados terminaría convirtiendo a las estadísticas en fines antes que en medios en una tendencia ciertamente maquiavélica. La obsesión por la consecución de unos equilibrios macroeconómicos siempre medido en macromagnitudes –desde la inflación hasta el déficit– antes que en términos sociales, crearía una *obsesión estadística*. Sin este presupuesto de partida, de hecho, resulta a todas luces complicado examinar detenidamente la acción gubernamental socialista.

Sustituidas las categorías políticas por las estadísticas a la hora de explicar las propias políticas y estrategias emprendidas, el discurso público y privado tanto del Partido como del Gobierno, adquiriría también un acento elitista-académico. Un discurso explicativo/justificativo no apto para las masas. O dicho con las palabras de Darrell Huff y Irving Geis se presentarían las mismas, en no pocas ocasiones, a través de un *lenguaje secreto* no comprensible para la ciudadanía.

En parte, el crecimiento de la distancia entre gobernados y gobernantes tendría aquí una de sus principales vías explicativas. Así pues, escasa sería la voluntad política de explicar y hacer entender las cifras, si no era para reforzar la política económica emprendida. En cualquier caso, lo anterior no sería obstáculo en situaciones concretas para que dada la situación realizar la *necesaria tarea pedagógica* –tal y como la definieron los propios políticos socialistas– de explicar el inevitable camino emprendido y reclamar a su vez todo tipo de “solidaridades. La intervención en TVE de Felipe González un domingo por la noche de un 10 de marzo de 1984 de cara a justificar y reforzar los porqués de su política económica –con especial énfasis en el proyecto de reconversión industrial– constituirán el mejor ejemplo para nuestro tiempo. En aquella ocasión sin aportar un solo dato –tal y como veremos en el capítulo 9– justificaría –de cara a frenar la extendida conflictividad obrera y social– el proyecto de modernización en razones macroeconómicas antes que políticas. Una línea de acción política que se mantendría hasta el final de la época socialista.

Esta forma de entender e interpretar la política en rara ocasión iba a ser denunciada desde las propias filas socialistas, asumiendo e interiorizándose progresivamente como un hecho natural. Junto con la suave crítica que tiempo después realizaría el propio Joaquín Almunia en sus *Memorias políticas*⁶⁰⁸, sería precisamente Joaquín Leguina en 1987 –entonces socialista y Presidente de la Comunidad de Madrid– uno de los pocos dirigentes del partido, quien se atrevería a denunciar tal forma de proceder en una conferencia pronunciada en Madrid en abril de 1987. Tras la crítica al manido discurso de “no hay otra política posible” denunciaría:

«Todo discurso gubernamental de carácter nacional, máxime si el país acaba de entrar en una instancia denominada Comunidad Económica Europea, tenderá a hablar de economía o,

⁶⁰⁷ Además del ya varias veces citado trabajo del, COLECTIVO IOE [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de, con la colaboración de MATEOS, Emma], *Barómetro social de...*, *op.cit.*, consúltese también la propuesta de estudio planteada en su día por, TAFALLA, Joan, BEL, Josep y VALENZUELA, Pep (coords.), *Miradas sobre la precariedad: debate y propuesta para una ‘encuesta sobre el trabajo’ y la reconstrucción del sindicalismo de clase*, Barcelona, El Viejo Topo, 2006.

⁶⁰⁸ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*. Un hecho también reconocido tiempo después por el propio, MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*.

más con precisión, de macroeconomía. Se produce una traslación de los fines hacia los medios y de la política en general a la política económica. Así, los fines de desarrollo económico y su correlato de desarrollo social, se difuminan en beneficio de los medios [...]. Esta sustitución de los fines sociales por los medios económicos tiene consecuencias, no sólo en el campo del discurso ideológico, sino en el campo del propio ejercicio del poder político. En el campo ideológico el discurso deviene macroeconómico y, por tanto, reduccionista, desilusionante y dependiente»⁶⁰⁹.

Pero más allá de este claro predominio de las lecturas tecnocráticas, los socialistas en su permanente justificación de la “única política posible” –es decir, bajo la tenaza del síndrome del NHA que describiera José María Maravall tiempo después⁶¹⁰– destacarían por dos grandes vías –con sus consiguientes ramificaciones– a la hora de proceder en la construcción de “su” realidad estadística. Como tiempo tendremos de observar aquello terminaría deviniendo en una especie de sucedáneo de un más que singular “realismo mágico” por parte del socialismo español, en la lectura de la situación socioeconómica de la nación. Primero, a través cambios metodológicos en las principales estadísticas laborales del país. Y cuando estos mismos cambios no dieron los resultados esperados, se recurría a tres argumentos fundamentales *ad hoc*: primero, el de la acusación de la escasa fiabilidad de las estadísticas existentes⁶¹¹, a pesar de ser sus principales responsables –cuestión esta sobre la que nos detendremos más adelante de forma específica–; segundo, no se dudaría en denunciar grandes conspiraciones de determinados sectores políticos o de los propios trabajadores. Nos encontraríamos aquí en lo que bien se puede denominar como el singular “realismo mágico” de los socialistas. Así sucedería a los dos años de gobierno socialista cuando Felipe González –en una publicación partidista que como otras pocas expresaría la instalación de una nueva cultura política ya imperante dentro y en los contornos del socialismo– ante la perspectiva de que no se cumplirían la creación de los 800.000 puestos de trabajo declarararía:

«Respecto al paro y al incumplimiento de la oferta electoral socialista de creación de 800.000 puestos de trabajo, voy a decir una cosa que probablemente va a ser un escándalo. Lo del paro es una tragedia, pero yo estoy convencido de que nosotros ya hemos creado 400.000 puestos de trabajo. Nosotros debemos cambiar el mensaje del paro, que es un mensaje desilusionador, que genera más paro; es necesario cambiar este mensaje. Hay un paro registrado altísimo. Se están haciendo estudios desde distintas instituciones desde el Ministerio de Trabajo, desde las Universidades de las regiones, desde Ayuntamientos para comprobar la realidad del paro que hay registrado, y es una realidad relativa [...]. Eso que hay gente que está haciendo dos trabajos fuera de todo control. Se han encontrado algunos sitios donde figuran en el registro 10.000 parados, se han hecho entrevistas uno a uno y han quedado ¡350 parados! ¿Qué ocurre con los otros? Los otros llevan 25 años haciendo lo mismo que están haciendo ahora, pero nunca se habían registrado. Son economías sumergidas [...]. Aún hay más, hay determinados colectivos sociales, por ejemplo la ultraderecha, que dan la consigna a su sector para que se apunte el paro [...]. Luego hay otra realidad, cuando una persona pierde el puesto de trabajo, que eso es otra realidad trágica, pero hay que analizarla, si es cabeza de familia –por ejemplo con esposa y dos hijos– se apuntan los cuatro al paro para tener más posibilidades [...]. De ahí deduzco que un número importante de puestos de trabajo se han creado, lo que pasa es que eso no implica el que no se haya incrementado el registro de las personas que no estaban trabajando y que ahora están registradas. Quizás, incluso, no pensaban trabajar»⁶¹².

⁶⁰⁹ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Sindical, Joaquín Leguina, “El discurso socialista en la encrucijada”, Madrid, octubre de 1987, sig. 002906-005, pp. 5-6.

⁶¹⁰ MARAVALL, José M^a, *El control de..., op.cit.*

⁶¹¹ Véanse las preguntas que en su día se realizaron: ELVIRA, Salce y RAMOS, Javier, ¿Existen estadísticas de paro”, *El País*, 12 de marzo de 1985.

⁶¹² Declaraciones de Felipe González, recogidas en, GONZÁLEZ, Felipe y GUERRA, Alfonso, *Felipe González, de Suresnes a la Moncloa: recuerdos e impresiones de Alfonso Guerra*, Madrid, Novatex, 1984, pp. 148-149. Al respecto véase también el comentario de Justino Sinova y Javier Tusell, quienes atribúan dicha frase al Vicepresidente del Gobierno: «Alfonso Guerra [...] no dudo en afirmar a mitad de la primera legislatura, año de 1984, que el Gobierno socialista ya había creado la mitad de los

En otros casos, el propio Almunia o Carlos Solchaga no dudarían también en denunciar la incomprensible actitud de que los desempleados se apuntarán al INEM al calor del *espíritu del cambio*, con el la “aparente” intención de dañar la imagen y credibilidad del Gobierno:

«[A]simismo uno podría preguntarse si en la España de finales de los setenta y primeros ochenta la proliferación de la apertura de las oficinas del INEM era la consecuencia inevitable de la extensión del paro o éste se expandía por la España rural y los barrios periféricos de las grandes ciudades conforme se abría el registro del paro en las nuevas oficinas del INEM»⁶¹³.

El tercer gran argumento de los socialistas residiría en la denuncia de los fraudes que cometían los trabajadores, y a quienes se les atribuía la “voluntad” y la “capacidad” de alterar las propias realidades estadísticas. Por más que aquellos mismos gobiernos se autodefinieran como *progresistas* o *solidarios*, no faltarían, por ejemplo, todo tipo de acusaciones contra los trabajadores en su (supuesta) implicación en la extendida realidad de la economía sumergida y de recibir al mismo tiempo las prestaciones por desempleo. Mientras que, la voluntad política de combatir este lacra económica se limitaría, en la práctica, al campo de las declaraciones⁶¹⁴; por otro lado, escasas serían las críticas de los mismos socialistas a la clase empresarial que se lucraba con esa actividad ilegal. No sólo es que no se persiguiera este tipo de delitos – garantizando, por ende, la impunidad de los empresarios clandestinos– sino que se les llegaría a los mismos a solicitar la posibilidad de «motivar a los sectores que hoy actúan en la economía sumergida a emerger, sin que pierdan por ello su flexibilidad y competitividad»⁶¹⁵.

Pero además la denuncia de estos “fraudes” –en la mayor parte de los casos sin evidencias empíricas y por tanto estadísticas concluyentes– tendrían otra *virtud*: se convertirían en poderosos argumentos para justificar políticamente la necesidad no discutible de determinadas reformas. Por este mismo camino, se justificarían desde el recorte de las prestaciones por desempleo en 1992⁶¹⁶, hasta unos años antes la propia la reforma de la Ley de Pensiones de 1985⁶¹⁷ –por cierto ambas medidas contestadas tras meses de movilización con sendas huelgas generales–. Así la campaña emprendida en los meses anteriores a la aprobación de la citada normativa de 1985 por parte del Ministerio de Trabajo, llevaría a Joaquín Almunia a declarar tiempo más tarde:

«Se producían fraudes pavorosos en las pensiones por invalidez. En algunas provincias de España, parecía que había habido una guerra, dado el número de inválidos que registraba y de cómo había ido creciendo la cifra de los últimos años. Se daba también el proceso llamado ‘compra de pensiones’ por el que, cotizando lo mínimo –dos años para la base reguladora de la

empleos prometidos, 400.000. Lo dijo en un libro propagandístico [GONZÁLEZ, Felipe y GUERRA, Alfonso, *Felipe González...*, *op.cit.*] para celebrar el ‘paso del ecuador’ del Gobierno, pero nadie podía esperar un recurso tan sorprende como el que eligió: esos puestos de trabajo habían sido creados en la llamada ¡‘economía sumergida’!, es decir, en esa esfera de la actividad económica que se sitúa al margen de la ley, donde no se pagan ni impuestos ni seguros sociales, donde el trabajo no encuentra la defensa de sus derechos. Y era todo un socialista –dirigente socialista, al menos– el que se aprovechaba de esa ilegalidad». SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *La crisis de...*, *op.cit.*, p. 39.

⁶¹³ SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, *op.cit.*, p. 189.

⁶¹⁴ Sobre esta misma cuestión se volverá con detenimiento en el Capítulo “6. La «revolución burguesa pendiente»: las vicisitudes de la *única política posible* y/o el síndrome NHA” y en el Capítulo “7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de crecimiento”.

⁶¹⁵ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31 Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 45.

⁶¹⁶ Ley 22/1992, de 30 de julio, *de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo* [B.O.E. 4 de agosto de 1992].

⁶¹⁷ Ley 26/1985, de 31 de julio, *de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social* [B.O.E. 1 de agosto de 1985]. Sobre esta cuestión nos detendremos en el Capítulo “7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de crecimiento”.

pensión, y diez años de cotización a lo largo de toda la vida laboral–, ya se tenía derecho a la pensión. Y como había un complemento de mínimo, era una pensión mucho más cara que la que se había cotizado. Con diferencia. Era necesario, entonces, introducir medidas de ajuste, y empezamos a discutir»⁶¹⁸.

Aunque se podría añadir otros innumerables ejemplos, con los ya descritos queda acreditada la forma de proceder de los socialistas en este campo. De esta forma, durante los años socialistas nadie estuvo a salvo de acusaciones y denuncias de alterar la marcha de la economía. Aunque la clase trabajadora acapararía la mayor de las atenciones, no llegarían a escapar de esta extendida culpabilización ni el *pollo* –congelado para más señas– ni el *conejo* tiempo después. Acusados ambos de elevar perjudicialmente los índices del IPC⁶¹⁹. Así pues, aquella lectura tecnocrática sustentada en las estadísticas –a modo de ciencia antes que realidad social y humana– y promocionada por los socialistas –poco propensos a críticas y autocríticas en este mismo campo– las mismas se terminaría convirtiendo en un poderoso instrumento de dominación política y económica.

Pocas han sido las reflexiones que desde el campo de la historiografía se han llevado a cabo sobre esta problemática. Una problemática que no empieza ni termina en las propias estadísticas exclusivamente como acabamos de ver. Hace tiempo superado aquella *historia cuantitativa y/o cuantitavista* –sobre la que nos detendremos enseguida– y su más conocido enfoque metodológico –la cliometría, de la que apenas ha quedado rastro para las nuevas generaciones de investigadores– el empleo de las estadísticas y otros datos similares se ha tendido a “normalizar” sin mayores traumas. Y cuando hablamos de *normalizar* no nos referimos a que su empleo sea hoy de uso común. No. Nos referimos a que no suele ir acompañada de aparato crítico ni reflexiones como las aquí vertidas. Todo ello a pesar de nuestra proclive inclinación a incorporar la estadística oportuna, que venga a apoyar la interpretación histórica de turno.

Así pues, generalmente se ha procedido sin mayores contratiempos a reseñar tal o cual dato y poner la cita correspondiente. Todavía más, se ha tendido –y esto quizás resulte tanto o más grave que lo anterior– a desatender que tras cada cifra suele estar nombres y apellidos. Por esta misma senda, no sólo es que se haya deshumanizado a los relatos dados, sino que además se ha afianzado una historia sin sujetos, sin protagonistas, sin hombres ni mujeres⁶²⁰.

Una posible explicación a todo lo anterior tal vez tenga que ver con el escaso peso y desarrollo en España de una historia cuantitativa, que desde su inicial y parcial aparición a mediados de los cincuenta y sesenta nunca terminaría por arrancar y arraigar en nuestro caso⁶²¹. Esto no significa que no se publicarán en su momento obras e investigaciones, pero de ahí a formar una corriente o una escuela dista un abismo. Así en la mayor parte de los libros sobre historiografía, sus teorías, sus metodologías se habla ya en un pasado –reciente eso sí–

⁶¹⁸ En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, pp. 160-161.

⁶¹⁹ Véase, Noticia, Gustavo Matías, “El Gobierno intentará encajar en su política económica la subida de los precios e impedir que se repita «el accidente»”, *El País*, 1 de septiembre de 1984.

⁶²⁰ Véanse aquí, primero, de nuevo las reflexiones de, HOBBSAWM, Eric J., “¿Se ha detenido la marcha adelante del movimiento obrero?” en *Política para una...*, *op.cit.*; y también de forma destacada las tesis manejadas por el propio, FONTANA, Josep, *La historia de los hombres*, Barcelona, Crítica, 2001.

⁶²¹ Consúltense aquí: COLL, Sebastián, “La nueva historia económica y su influencia en España” en RUEDA HERNÁZ, Germán (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, Universidad de Cantabria / Asamblea Regional de Cantabria, 1991, pp. 69-120; y, FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano, “La historia económica, ¿un filón que se agota?” en SÁNCHEZ NISTAL, José M^a [et al.], *Problemas actuales de la historia. Terceras Jornadas de Estudios Históricos*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, pp. 68-82.

superado⁶²². Por lo demás, fue Julio Aróstegui con su obra varias veces citada –*La investigación histórica*– quien no sólo introdujo la necesidad de diferenciar entre cuantitativismo y cuantificación, o lo que es lo mismo historia cuantitativa e historia cuantificada, sino que alertó de los posibles peligros de la aplicación de un “paradigma *cuantitavista* en la explicación de lo social”⁶²³.

La historiografía de la historia de la *New Economic History*⁶²⁴ –principalmente por y a través de la cliometría⁶²⁵– o de su influencia en la segunda y tercera generación de *Annales*⁶²⁶ – como en menor medida en la entonces conocida *Social History* con la familia Tilly en primer lugar⁶²⁷– es sobradamente conocida⁶²⁸, así como sus principales obras –de complicado

⁶²² MORADIELLOS, Enrique, *El oficio del historiador*, 6ª ed., Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 69-ss. Libro precursor en castellano en este sentido, FONTANA, Josep, *Historia: análisis del...*, *op.cit.*, pp. 190-ss.

⁶²³ ARÓSTEGUI, Julio, *La investigación histórica...*, *op.cit.*.

⁶²⁴ Véase, primero, el estado de la cuestión a mediados de los años ochenta de, O'BRIEN, Patrick, “Las principales corrientes actuales de Historia Económica”, *Papeles de Economía Española*, n° 20, (1984), pp. 383-399. También, ANDREANO, Ralph L., *The New Economic History. Recent Papers on Methodology*, New York, John Wiley & Sons, 1970. Consúltese también el amplio conjunto de trabajos contenidos en: TEMIN, Peter (ed). *La nueva historia económica. Lecturas seleccionadas*, Madrid, Alianza, 1984.

⁶²⁵ Obra básica de referencia en, BACCINI, Alberto y GIANNETTI, Renato, *Cliometría*, Barcelona, Crítica, 1997. Textos también de referencia en, McCLOSKEY, D. N., “The Achievements of the Cliometric School”, *Journal of Economic History*, vol. XXXVIII, n° 1, (1978), pp. 13-28; WILLIAMSON, Jeffrey, “La cliometría: una visión norteamericana”, *Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History*, vol. VIII, n° 1, (1990), pp. 39-52. Y desde otro ángulo de visión: KALMANOVITZ, Salomón, “La cliometría y la historia económica institucional: reflejos latinoamericanos”, *Historia Crítica*, n° 27, (2005).

⁶²⁶ El primer lugar consúltese el estado de la cuestión ofrecido en su día por, HEFFER, “Une histoire scientifique: la Nouvelle Histoire Économique”, *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, vol. XXXII, n° 4, (1977), pp. 824-842. Más recientemente: ROMANO, Ruggiero, “Historia cuantitativa, historia económica e historia: algunas consideraciones sobre la historiografía francesa de hoy”, *Anales de historia antigua y medieval*, n° 28, (1995), pp. 61-72. Sobre su influencia en España, RUIZ TORRES, Pedro, “De la síntesis histórica a la historia de *Annales*. La influencia francesa en los inicios de la renovación de la historiografía española” en PELLISTRANDI, Benoît (comp.), *La historiografía francesa del siglo XX y su acogida en España: coloquio internacional (noviembre de 1999)*, Madrid, Casa Velázquez, 2002, pp. 83-107.

⁶²⁷ LANDES, David S., LINZ, Juan J., TILLY, Louise A. y TILLY, Charles [et a.], *Las dimensiones del pasado: Estudios de historia cuantitativa*, Madrid, Alianza, 1975. Y asimismo: LORWIN, Val R. y PRICE, Jacob M. (eds.), *The dimensions of the past: materials, problems, and opportunities for quantitative work in history*, New Haven / London, Yale University Press, 1972.

⁶²⁸ A nivel teórico como metodológico, en primer lugar, se debe citar la obra de, MARCZEWSKI, Jean, *Introduction à l'histoire quantitative*, Genève, Droz, 1965; y en segundo término, el trabajo de, ERICKSON, Charlotte, “Quantitative History”, *The American Historical Review*, vol. LXXX, n° 2, (1975), pp. 351-365. Y también ha de tenerse presente obras como las de, FLOUD, Roderick, *Métodos cuantitativos para historiadores*, Madrid, Alianza, 1975 [traducción de, *An introduction to quantitative methods for historians*, London, Methuen, 1973]; CHAUNU, Pierre., *Historia cuantitativa, historia serial*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. Más recientemente: SALY, Pièrre, *Méthodes statistiques descriptives pour les historiens*, Paris, A. Colin [1991] ; o, DARCY, R y ROHRS, Richard, *A guide to quantitative history*, Westport (Connecticut), Praeger, 1995. En castellano, nos remitimos a, CARRY, Alain, “Cuentas flexibles e historia económica cuantitativa” en ARANDA PÉREZ, Francisco José, SANZ CAMAÑES, Porfirio y FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco (coords.), *La historia en una nueva frontera = History in a new frontier*, Cuenca, Servicio de Publicaciones de Castilla-La Mancha, 2000. Por lo demás: KUZNETS, Simon, *Aspectos cuantitativos del desarrollo económico*, México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1959; y unos años después id., *El crecimiento económico moderno*, Madrid, Aguilar, 1973. En similar línea, EASTERLY, Williams, *The Elusive Quest*

acercamiento para los “no iniciados” – para detenernos en los mismos⁶²⁹. Ahora bien, quizás –de nuevo– lo más relevante –desde nuestro punto de vista histórico del presente vivido– sería que todos aquellos autores partieron de lo que también Aróstegui catalogara como una “ilusión cientifista”, con la que pretendieron superar las líneas tradicionales del conocimiento histórico y avanzar hacia una “historia científica” si no pura si prácticamente exacta⁶³⁰.

Rápidamente enterrada por sus detractores en plena vorágine posmodernista –con Lawrence Stone con *Revival of Narrative* a la cabeza⁶³¹– como una mera utopía –aunque no pocas matizaciones cabrían introducir–; sin embargo aquel intento de examinar lo histórico desde los datos, la informatización y otras metodologías innovadoras, iba a dejar su “huella”⁶³². Con todo, el hecho –prácticamente objetivo– es que hablar hoy de una posible historia cuantitativa pero sobre todo de “estructuralismo”, llega a resultar tanto anacrónico como sospechoso de viejas inercias que se han dado felizmente por superadas.

Si bien, en este trabajo de investigación no *bebe* directamente de estas corrientes ni asume como propia su metodología, en cambio sí tiene presente que la cuantificación de fenómenos económicos, laborales y socio-históricos –a través del uso pero también de la construcción de un amplio corpus estadístico– constituyen un punto de apoyo básico para una historia social global, bajo los criterios, críticas y precauciones descritas⁶³³. ¿Cómo sino –nos interrogamos– se puede historiar con precisión las dimensiones de un cambio social?

Teniendo presente estos complejos puntos de partida, lo cierto, es que no han abundado los trabajos de los historiadores económicos al respecto. A pesar de que actualmente es posible acceder a prácticamente cualquier estadística con un solo “click”, los historiadores e investigadores no han dispuesto hasta tiempo muy reciente de esta enorme cantidad de información.

for Growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 2002 [*El busca del crecimiento: andanzas y tribulaciones de los economistas del desarrollo*, Barcelona, Antonio Bosch, 2003].

⁶²⁹ Los tres clásicos ejemplos de obras deudoras con la climoetría serían: CONRAD, Alfred H. y MEYER, John, *The Economics of Slavery and Other Studies in Econometric History*, Chicago, Aldine Publishing, 1964; FOGEL, Robert W., *Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History*, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1964 [*Los ferrocarriles y el crecimiento económica de Estados Unidos. Ensayos de historia econométrica*, Madrid, Tecnos, 1974]; FOGEL, Robert W. y ENGERMAN, Stanley L., *Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery*, New York, W.W. Norton and Company, 1974 [*Tiempos en la cruz. La economía esclavista en los Estados Unidos*, Madrid, Siglo XXI, 1981. Véase la reseña de, GENOVESE, Eugene D., “Materialism and Idealism in the History of Negro Slavery in the Americas”, *Journal of Social History*, vol. I, nº 4, (1968), pp. 371-394]. También aquí cabría incluir el libro de, WILLIAMSON, Jeffrey, *Late nineteenth-century American development. A general equilibrium History*, London, Cambridge University Press, 1974.

⁶³⁰ ARÓSTEGUI, Julio, *La investigación histórica...*, *op.cit.*.

⁶³¹ STONE, Lawrence, “The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History”, *Past and Present*, nº 85, (1979), pp. 3-24. Otro texto clásico desde la misma perspectiva en: FURET, François, “L’histoire quantitative et la construction du fait historique”, *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, vol. XXVI, nº 1, (1971), pp. 63-75.

⁶³² Una exhaustiva recopilación bibliográfica sobre este tipo de trabajos en, GROSSBART, Stephen R., “Quantitative and Social Science Methods for Historians. An Annotated Bibliography of Selected Books and Articles”, *Historical Methods*, vol. XXV, nº 1, (1992), pp. 100-120.

⁶³³ Nos remitimos aquí a las reflexiones y aportaciones de, ARRIBAS MACHO, José Mª, “El modelo estadístico desde la perspectiva cualitativa”, *Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales*, nº 1, (1998), pp. 85-96; y concretamente a, BERNARDI, Fabrizio, *Análisis de la historia de acontecimientos*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006. Y claro está a una de las aportaciones centrales de, IBÁÑEZ, Jesús, “Las medidas de la sociedad”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 29, (1985), pp. 85-128.

Precusores, en este sentido, serían las investigaciones de historiadores como Josep Fontana acerca del proceso de industrialización durante el siglo XIX y el fin del antiguo régimen⁶³⁴; pero sobre todo aquellos estudios acerca de la agricultura española, sus precios, su niveles de producción, en donde junto con obras como la de Nicolás Sánchez-Albornoz –*Los precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX*⁶³⁵– destacarían las investigaciones del Grupo de Estudios de Historia Rural –con trabajos como *Los precios del trigo y la cebada en España, 1891-1907 o Estadísticas históricas de la producción agraria española, 1859-1935*⁶³⁶–. Alejadas de las preocupaciones y enfoques de la *New Economic History* y de la propia cliometría, sus iniciales contribuciones se situarían entre mediados de los setenta y los primeros ochenta, cuando incluso se llegaría a celebrar el siempre mencionado *Seminario de Historia Cuantitativa* en Madrid en diciembre de 1983⁶³⁷.

No obstante, han sido en estos últimos años cuando más y mejores obras se han publicado al respecto. En ello no sólo ha tenido que ver la consolidación de líneas aisladas de investigación precedidas de las obras y autores ya citados, sino las ahora ilimitadas posibilidades que la informatización ha generado. Ejemplo de ello sería la publicación en 1990 de *Industrialización española: estudios de historia cuantitativa* de Albert Carreras uno de los mayores especialistas al respecto⁶³⁸. Por otro lado, cabría citar, a modo de ejemplo, como en el siguiente lustro sobre Andalucía se publicarían tres obras desiguales pero harto significativas de los alcances de una posible historia cuantitativa. Ahí estaría la tesis doctoral de Estrella Gualda Caballero –*Cambios social y tecnológico en el triángulo industrial de Cádiz, Huelva y Sevilla (1990-1991)*⁶³⁹– o la monografía de María F. Martínez Romero –*Diez años de la economía andaluza (1977-1987): una historia cuantitativa*⁶⁴⁰– o tiempo más tarde la extraordinaria

⁶³⁴ FONTANA, Josep, *La crisis del antiguo régimen, 1808-1833*, Barcelona, Crítica, 1979; y, unos años antes, id., *La quiebra de la Monarquía Absoluta*, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 1974.

⁶³⁵ SÁNCHEZ-ALBORNOS, Nicolás (recopilación, análisis y estudio preliminar), *Los precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX*, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1975.

⁶³⁶ GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, *Los precios del trigo y la cebada en España, 1891-1907*, Madrid, Banco de España, 1980; id., *Estadísticas históricas de la producción agraria española, 1859-1935*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un grupo formado actualmente por: Domingo Gallego Martínez, José Ignacio Jiménez Blanco, Enrique Ángel Roca Cobo, José Antonio Sebastián Amarilla, Juan Francisco Zambrana y Santiago Zapata Blanco.

⁶³⁷ PRADOS de la ESCOSURA, Leandro, “La historia cuantitativa en España: nota sobre el Seminario de Historia Cuantitativa, celebrado en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1983”, *Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic History*, vol. II, nº 1, (1984), pp. 169-176. Consúltense también: WEE, Herman van der, “Métodos y técnicas cuantitativas nuevas en historia económica cuantitativa” en VÁZQUEZ DE PRADA, Valentín (ed.), *El método histórico: sus posibilidades y límites [Actas de las I Conversaciones Internacionales de Historia, Universidad de Navarra (Pamplona, 1-3 marzo, 1972)]*, 3ª ed., Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1972, pp. 135-140.

⁶³⁸ CARRERAS, Albert, *Industrialización española: estudios de historia cuantitativa*, Madrid, Espasa-Calpe, 1990. También aquí consúltense los datos ofrecidos, desde otros campos, en: ARGANDOÑA, Antonio y GARCÍA-DURÁN, José Antonio, *La economía española en cifras*, Barcelona, Orbis, 1985; y, BAIGES, Josep, MOLINAS, César y SEBASTIÁN, Miguel, *La economía española, 1964-1985*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1987.

⁶³⁹ GUALDA CABALLERO, Estrella, *Cambio social y tecnológico en el triángulo industrial de Cádiz, Huelva y Sevilla (1990-1991)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1995.

⁶⁴⁰ MARTÍNEZ ROMERO, Mª Francisca, *Diez años de la economía andaluza (1977-1987): una historia cuantitativa*, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1997.

recopilación de Lina Gálvez en *Estadísticas históricas del mercado de trabajo en Andalucía en el siglo XX*⁶⁴¹.

Ahora bien, ha sido en esta década última cuando se ha asistido a la publicación de las grandes recopilaciones estadísticas. En 2003 se publicaría la que es hoy una de las obras de referencia ya consolidadas, tanto por su calidad como ingente cantidad de datos: *Atlas de la industrialización de España, 1750-2000* bajo la dirección de Jordi Nadal⁶⁴². En aquel mismo año y dentro de la colección de estudios patrocinados por la Fundación BBVA –principal empresa editorial patrocinadora al respecto en España– se editaría la también el magno trabajo de Leandro Prados de la Escosura, *El progreso económico de España (1850-2000)*⁶⁴³. Y finalmente dos años después se publicaría la revisión y ampliación de la obra colectiva central en nuestro caso: *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX* coordinada por Albert Carreras y Xavier Tafunell⁶⁴⁴. Publicada originalmente en 1989 su reedición en 2005 vendría a suplir con creces un vacío bibliográfico cada vez más consolidado.

Precisamente, han sido dichos volúmenes colectivos los que más han ayudado a la presente investigación. Obra en donde no sólo se puede encontrar centenares de estadísticas, cuadros, gráficas... –con las correspondientes revisiones y últimas actualizaciones en cada apartado– sino que además cada capítulo viene precedido por un completo estado de la cuestión y una amplia bibliografía. En concreto, y dado su amplio uso, conviene avanzar los capítulos que más se han empleado: “Industria” de Albert Carreras⁶⁴⁵; “Urbanización y vivienda” de Xavier Tafunell⁶⁴⁶; “Sistema monetario y financiero” de Pablo Martín Aceña y María Ángeles Pons⁶⁴⁷; “Sector Público administrativo y estado del bienestar” de Francisco Comín y Daniel Díaz⁶⁴⁸; “Gobierno y Administración” de Jacint Jordana y Carles Ramió⁶⁴⁹; “Renta y riqueza” de Albert Carreras y Leandro Prados de la Escosura⁶⁵⁰; “Consumo y precios” de Jordi Maluquer⁶⁵¹; y especialmente, “Trabajo y relaciones laborales” de Jordi Maluquer y Montserrat Llonch⁶⁵².

Por lo demás, un balance general del repertorio de estadísticas para historiar este tiempo, se pueden localizar en el trabajo de José Ángel Pérez, María Teresa Duarte Atoche y

⁶⁴¹ GÁLVEZ, Lina, *Estadísticas históricas del mercado de trabajo en Andalucía en el siglo XX*, Sevilla, Instituto de Estadística de Andalucía, 2008.

⁶⁴² NADAL Jordi (dir.), *Altas de la industrialización de España, 1750-2000*, Barcelona, Crítica / Fundación BBVA, 2003, incluye un CD-ROM.

⁶⁴³ PRADOS de la ESCOSURA, Leandro, *El progreso económico de España (1850-2000)*, Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

⁶⁴⁴ CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2ª ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989] más un CD-ROM.

⁶⁴⁵ CARRERAS, Albert, “Industria” en *ibídem*, pp. 357-453.

⁶⁴⁶ TAFUNELL, Xavier, “Urbanización y vivienda” en *ibídem*, pp. 454-499.

⁶⁴⁷ MARTÍN ACEÑA, Pablo y PONS, Mª Ángeles, “Sistema monetario y financiero” en *ibídem*, pp. 647-706.

⁶⁴⁸ COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en *ibídem*, pp. 872-964.

⁶⁴⁹ JORDANA, Jacint y RAMIÓ, Carles, “Gobierno y Administración” en *ibídem*, pp. 973-1026.

⁶⁵⁰ CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en *ibídem*, pp. 1296-1376

⁶⁵¹ MALUQUER, Jordi, “Consumo y precios” en *ibídem*, pp. 1246-1296.

⁶⁵² Id. y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en *ibídem*, pp. 1155-1245.

Guillermo J. Sierra, *Una visión histórica de la contabilidad nacional*⁶⁵³. Como también en el de Sebastián Coll y José Ignacio Fortea, *Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica de España*⁶⁵⁴.

A lo dicho se suman un conjunto de revistas especializadas que como *Estadística española* llevan publicándose desde 1959 o *Questiò: Quaderns d'Estadística Sistemes, Informàtica i Investigació Operativa* desde el año 1977. Revistas que han abundado tanto en cuestiones prácticas como empíricas. A las citadas habría que sumar el *Boletín de Estadística e Investigación Operativa* (1985-...), *Metodología de Encuestas* (1999-...) o *Índice: revista de estadística y sociedad* (2003-...) y la ya desaparecida, *Fuentes Estadísticas* (1999-2002), fruto de una colaboración entre el INE y Eurostat.

Sin embargo, por la propia temática de esta tesis doctoral se ha profundizado en las estadísticas sobre el mercado de trabajo. Aunque en las siguientes páginas se procederá a realizar un recorrido por las principales estadísticas empleadas, vaya por delante la citada de un conjunto de obras especializadas, que han resultado de enorme utilidad. Junto con las citadas previamente⁶⁵⁵, el trabajo de referencia lo sigue constituyendo la obra de José Ignacio Pérez Infante, *Las estadísticas del mercado de trabajo en España*⁶⁵⁶. A la mencionada cabrían añadir obras como las de Iñigo Carayalde y Lide Salvador –*Indicadores del mercado de trabajo: análisis de fuentes de información e indicadores*⁶⁵⁷– la de Vicente Rodríguez Sosa y Rosario Asián Chaves –*Indicadores y fuentes estadísticas para el análisis de los mercados de trabajo*⁶⁵⁸– el trabajo de Julio Alcaide Inchausti –*Estadísticas de empleo: problemas de medición*⁶⁵⁹– y más recientemente, Carmen Ramos Carvajal y Esteban Fernández Vázquez –*Fuentes de información estadística del mercado laboral*⁶⁶⁰–.

En este panorama descrito, en poco o nada ayudaría a aclarar la situación de cada momento, las más que frecuentes “guerras de cifras” en medio de una crisis económica y un acelerado como intenso proceso de destrucción de empleo durante nuestro periodo de investigación. *Guerras de cifras*, principalmente, orientadas en torno al número de desempleados, sus porcentajes y sus diferentes lecturas cíclicas. De hecho, no faltan los casos de manipulación estadística por criterios confesables o no confesables. En formato refinado o más

⁶⁵³ PÉREZ LÓPEZ, José Ángel, DUARTE ATOCHE, M^a Teresa y SIERRA MOLINA, Guillermo Juan, “Una visión histórica de la contabilidad nacional”, *Revista de Gestión Pública y Privada*, n^o 9, (2004), pp. 233-252.

⁶⁵⁴ COLL, Sebastián y FORTEA, José Ignacio, *Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica de España*, II vols., Madrid, Banco de España, 1995.

⁶⁵⁵ Véase lo apuntado en la *nota 603* y *nota 605*.

⁶⁵⁶ PÉREZ INFANTE, José Ignacio, *Las estadísticas del mercado de trabajo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo, 2006.

⁶⁵⁷ GARAYALDE, Iñigo y SALVADOR, Lide, *Indicadores del mercado de trabajo: análisis de las fuentes de información e indicadores ocupacionales*, Vitoria / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996.

⁶⁵⁸ RODRÍGUEZ SOSA, Vicente y ASIÁN CHAVES, Rosario, *Indicadores y fuentes estadísticas para el análisis de los mercados de trabajo*, Sevilla, Instituto de Desarrollo Regional / Fundación Universitaria, 2006.

⁶⁵⁹ ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, “Estadísticas de empleo: problemas de medición” en *El mercado de trabajo en España I. Realidades y posibilidades*. Dossier monográfico, *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, n^o 1-2, (1999), pp. 321-342.

⁶⁶⁰ RAMOS CARVAJAL, Carmen y FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Esteban, “Fuentes de Información Estadística del Mercado Laboral”, *Documento de Trabajo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oviedo*, n^o 240, (2001).

burdo, las denuncias sobre determinadas decisiones –legales o no legales– de los diferentes ejecutivos al respecto no han cesado desde la llegada de la transición a la democracia⁶⁶¹.

Así pues, a los problemas estrictamente político-históricos que ya examináramos sobre la instrumentalización e inclusive politización de los datos estadísticos, por parte de políticos y técnicos socialistas, han de añadirse otras tantas. En primer término, el posible repertorio de estadísticas en los años setenta y ochenta resulta parcialmente limitado. No sólo en comparación con el amplio campo que hoy existe, sino también desde una perspectiva histórica comparada a nivel internacional. Las insuficiencias y limitaciones de las mismas, medidas en términos tanto de calidad como de amplitud, se convertiría en un segundo obstáculo en ocasiones difícil de superar. Y en tercer término, junto con los problemas de acceso se sumarían también el de la fiabilidad y las propias limitaciones cronológicas de una serie de encuestas estadísticas sobre el mercado de trabajo.

Presentadas estas necesarias acotaciones, a nivel internacional comparativo se han empleado las bases de datos de la OCDE⁶⁶², el FMI⁶⁶³ y la OIT⁶⁶⁴, todo ello a nivel generalista ya que los microdatos en la mayor parte de las ocasiones no estaban disponibles en red. Bases claves no sólo para contextualizar adecuadamente el caso español en una perspectiva internacional, sino de cara observar las grandes tendencias y ciclos del capitalismo contemporáneo. En cada apartado y cuestión específica se volverá a incidir en las posibilidades y limitaciones de cada una de las citadas.

En lo que respecta al análisis del mercado de trabajo español las principales referencias lo han constituido tanto la Encuesta de Población Activa como la de Eurostat. Ahora bien, antes de entrar en matizaciones concretas, para estos mismos años también se han empleado otras tantas. Tal y como ya se ha dejado planteado muchas de las que a continuación se citarán conllevan enfrentarse a los problemas y limitaciones descritas.

Primero, la estadística de “Coyuntura del mercado de trabajo” realizada por el INE y el Ministerio de Trabajo, entre diciembre de 1981 a 1986, y de carácter mensual⁶⁶⁵. A partir de esa misma fecha se consultaría, *Estadística de empleo: series*, de carácter anual⁶⁶⁶. Segundo, el *Boletín de Estadísticas Laborales* a cargo del Ministerio de Trabajo y disponible desde agosto de 1983, de carácter trimestral durante todo nuestro periodo⁶⁶⁷. Dentro de esta estadística se accedería a tanto al paro registrado como al denominado movimiento laboral registrado, y desde ahí a las demandas de empleo, contratos registrados o los datos de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. En tercer lugar, se consultaría también el *Anuario de Estadísticas Laborales* producido por el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, de carácter anual y disponible

⁶⁶¹ Por citar un ejemplo entre otros muchos posibles: MARTÍNEZ MÉNDEZ, P. [et al.], “Manipulación estadística”, *El País*, 22 de febrero de 1977.

⁶⁶² En concreto, nos referimos a las “Labour Statistics”: www.oecd.org

⁶⁶³ En este caso, se han empleado la serie “World Economic Outlook Databases”: www.imf.org.

⁶⁶⁴ De especial utilidad ha resultado “Laborsta-OIT” de cara a la homogeneización y comparación de los datos de conflictividad y huelgas –denominadas en la citada encuesta como “Huelgas y cierre patronales”– así como de empleo, desempleo y horas de trabajo. Todo ello en, laborsta.ilo.org. En el capítulo 9.5. “En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (febrero-julio de 1984)”, nos detendremos, específicamente, también sobre sus posibilidades y limitaciones.

⁶⁶⁵ INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, *Coyuntura del mercado de trabajo*, XXXVIII vols., Madrid, Instituto Nacional de Empleo / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1981-1986

⁶⁶⁶ Id., *Estadística de Empleo: series*, VI vols., Madrid, Instituto Nacional de Empleo / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986-1992.

⁶⁶⁷ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Boletín de Estadísticas Laborales*, CXXXI vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983-... A partir del año 2003 en formato electrónico en, www.meyss.es/estadisticas/bel/welcome.htm.

entre 1982/1983 a 1994⁶⁶⁸. Un amplio repertorio en donde se localizan los datos principales tanto del mercado de trabajo, formación profesional y medidas de apoyo al empleo y condiciones de trabajo y protección social. Y asimismo habría que destacar tanto los informes del Ministerio de Trabajo titulados *Empleo y paro durante... Coyuntura y programas de actuación* para los años 1984 y 1985⁶⁶⁹, los del Servicio del Observatorio Ocupacional – *Resumen anual de datos del Observatorio Ocupacional*– desde 1986⁶⁷⁰, así como la *Encuesta de coyuntura laboral* que realizada por la Dirección General de Informática y de Estadística –para nuestro periodo histórico, en tanto desde 1994 su ejecución correspondería al Ministerio de Trabajo– se encuentra disponible desde el segundo trimestre de 1990⁶⁷¹. Una fuente que proporciona una completa radiografía que va desde el número de efectivos laborales hasta las horas trabajadas y no trabajadas. Por lo demás, y dado la especificidad temática y metodológica en relación a las estadísticas relacionadas con las huelgas y los accidentes de trabajo en los respectivos capítulos en que se trata dicha cuestión, se incidirá en las principales características de las bases de datos empleadas.

En la actualidad cuando se observa el amplio repertorio así como la calidad de las estadísticas laborales disponibles, y que en su mayor parte comenzarían su andadura desde la segunda mitad de los noventa –nos referimos, por ejemplo, a la “Encuesta Trimestral de Coste Laboral” que permite a su vez acceder a la “Encuesta sobre el tiempo de trabajo”⁶⁷², o la propia “Encuesta de calidad de vida en el Trabajo” todas ellas producidas por el INE⁶⁷³– se nos presentan un escenario todavía más complejizado y con unos altos estándares de calidad estadística, impensables para la época en que nos movemos. En no pocos casos, se hace inevitable las posibles como inevitables comparaciones históricas. Ahora bien, lo cierto es que el conjunto de la época socialista se cuenta con un material estadístico suficiente con el que afrontar su posible estudio.

De esta forma, acceder tan sólo a la EPA –quien iniciará su recorrido en el año 1964– nos abre la posibilidad de examinar estadísticamente estos años con ciertas garantías. Considerada por la mayor parte de los expertos como la encuesta más confiable, y superado hace mucho tiempo el debate en torno a su mayor fiabilidad y calidad frente a las cifras del INEM en las diferentes mediciones del paro registrado⁶⁷⁴; sin embargo, no son pocos los

⁶⁶⁸ Id., *Anuario de estadísticas laborales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983-1994. Y a partir de 1995, MINISTERIO DE TRABAJOS Y ASUNTOS SOCIALES, *Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales*, Madrid Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1995-...

⁶⁶⁹ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Empleo y paro en España durante...: coyuntura y programas de actuación*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984-1985.

⁶⁷⁰ INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO / SERVICIO DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL, *Resumen anual de datos del Observatorio Ocupacional*, Madrid, Instituto Nacional de Empleo / Servicio del Observatorio Ocupacional, 1986-...

⁶⁷¹ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Encuesta de coyuntura laboral*, Madrid, Dirección General de Informática y Estadística, 1990-1994.

⁶⁷² INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, *Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) [base 2000 CNAE-93]*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2004 [www.ine.es=ETCL].

⁶⁷³ SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y LABORALES, *Encuesta de calidad de vida en el trabajo: año...*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999-... [www.meyss.es/estadisticas/ecvt/welcome.htm].

⁶⁷⁴ Luis Toharia planteó en su día una breve como aclaratoria explicación al respecto: «[M]ientras que la EPA genera una cifra estimada de parados, obtenida mediante criterios estadísticos rigurosos, que garanticen su representatividad dentro del conjunto del Estado español, las cifras de paro del INEM corresponden al número de personas registradas en sus oficinas como demandantes de empleo (y sin empleo declarado actual)». TOHARIA, Luis, “Los parados en España: cómo los medimos, cuántos hay y cuántos habrá”, *Debats*, n° 25, (1998), p. 61. Consúltense los aclaratorios trabajos de: IRANZO ACOSTA, José Luis y LACOMBA ARIAS, Beatriz, “Evolución de las discrepancias entre el desempleo

obstáculos que presenta⁶⁷⁵. Más allá de los consabidos problemas en relación a la economía sumergida⁶⁷⁶ o el sesgo de género⁶⁷⁷ y los asociados a la conceptualización de los términos empleados⁶⁷⁸, entre otros⁶⁷⁹; para nuestro objeto de estudio –y en general para los estudios acerca de las nuevas formas de contratación puestas en marcha desde mediados de los

medido por la EPA y el INEM mediante el coeficiente de desigualdad de Theil”, *Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales*, nº 35, (1998), pp. 111-123; y, PÉREZ INFANTE, José Ignacio, “La medición del desempleo en España: la EPA y el paro registrado”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 21, 2000, pp. 15-58; y del mismo autor, id., “¿Por qué el paro registrado supera al paro de la EPA?”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 71, (2008), pp. 53-65. Y, por último, MARTÍN ROMÁN, Ángel, “Ley de Okun, paro registrado y paro EPA”, *Boletín económico de ICE*, nº 2728, (2002), pp. 11-16; y, DOMINGO SANZ, M^a Victoria de, “El empleo y el paro: comparación de los resultados de la EPA con las fuentes administrativas”, *Economía española y Protección Social*, nº 3, (2011), pp. 37-62.

⁶⁷⁵ En torno a la metodología y problemáticas de los instrumentos estadísticos nos remitimos, en primer término, a buena parte de los trabajos publicados en el número 26, (1986) de *Papeles de Economía Española* en donde se incluirían un amplio conjunto de trabajos: MIGUEL CASTAÑO, Carmen, “La medición estadística del empleo y del paro” (pp. 2-25); MARCOS DOMÍNGUEZ, Pilar y FERNÁNDEZ MÉNDEZ de ANDRÉS, Fernando, “Notas explicativas sobre la realización de la EPA” (pp. 26-34); y, ESPÍN ARBANAT, M^a Victoria y DÍAZ RODRÍGUEZ, Juan Antonio, “Paro registrado en las Oficinas de Empleo” (pp. 35-39). Consúltense asimismo: MORILLAS RAYA, Antonio y SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Jesús, “Actividad, empleo y trabajo en España según la Encuesta de Población Activa”, *Revista de Estudios Regionales*, nº 36, (1993), pp. 333-364.

⁶⁷⁶ Junto con el ya citado informe clave de mediados de los años ochenta: MURO, Juan de Dios, RAYMOND, José Luis L., TOHARIA, Luis y URIEL, Ezequiel, *Análisis de las... op.cit.*, desde una perspectiva estrictamente metodológica: ARAMAYO, José Luis, MURO, Juan de Dios, TOHARIA, Luis y URIEL JIMÉNEZ, Ezequiel, “La Encuesta de Población Activa y la Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía..., op.cit.*, vol. III, pp. 111-142.

⁶⁷⁷ Entre otros trabajos que han analizado, desde una perspectiva crítica, la infravaloración del trabajo asalariado femenino en la EPA, ALVAREZ ALVAREZ, Florentina, “Indicadores sociales de la mujer en el área de empleo. Fuentes estadísticas para su elaboración” en INSTITUTO DE LA MUJER, *Indicadores sociales para la mujer: ponencias presentadas en el seminario ‘Indicadores Sociales sobre la Situación de la Mujer’*, Madrid, Instituto de la Mujer, 1993, pp. 9-24; MAYORDOMO GINES, Maribel y CARRASCO, Cristina, “Los modelos y estadísticas de empleo como construcción social: la Encuesta de Población Activa y el sesgo de género”, *Política y Sociedad*, nº 34, (2004), pp. 101-112. En términos más generales: CARRASCO, Cristina, *El trabajo doméstico y la reproducción social*, Madrid, Instituto de la Mujer, 1991; y concretamente, VÁZQUEZ, Norma y MURGUIALDAD, Clara, *Con la sartén sin mango: el trabajo doméstico, base invisible de la economía*, [Palma de Mallorca], Sindicat de Treballadors i Treballadors de l’Ensenyament / Intersindical de les Illes Balears, 2004. Por último, consúltense el documentado informe de, BOVER, Olympia y ARELLANO, Manuel, “Female labour force participation in the 1980s: the case of Spain”, *Documento de Trabajo del Banco de España*, nº 9427, (1994).

⁶⁷⁸ En primer lugar véanse: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Informe Malinvaud sobre estadísticas del empleo y del paro [Informe de la misión encomendada a Jacques Chirac a Edmond Malinvaud]*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989; y, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO [HUSSMANN, Ralf, MEHRAN, Farhad y VERMA, Vijay], *Encuestas de población económicamente activa, empleo, desempleo y subempleo. Manual de la O.I.T. sobre conceptos y métodos*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993. También, aclaratorio en este sentido, GARCÍA SÁINZ, Cristina, “Revisiones de conceptos en la Encuesta de Población Activa”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 61, (1993), pp. 173-184.

⁶⁷⁹ Al respecto, PERACCHI, Franco y JIMÉNEZ MARTÍN, Sergi, “La calidad de la EPA en la estimación de transiciones en el mercado de trabajo”, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 43, (1999), pp. 158-197. Y desde otra perspectiva: TOHARIA, Luis, “Mujer, familia y movilidad en España: un estudio basado en la EPA longitudinal, 1987-1998”, *Papeles de Economía Española*, nº 77, (1998), pp. 133-157.

setenta⁶⁸⁰ – la principal limitación es la ausencia de cualquier dato acerca de la evolución de la contratación temporal hasta el segundo trimestre de 1987. Año en que se produciría un importante cambio metodológico, a partir del cual se introduciría la medición de dicho aspecto. Es decir, carecemos de los datos necesarios para los tres primeros años de la formación histórica de la “cultura de la temporalidad”. Un vacío difícil de suplir con otras estadísticas, más allá de las relaciones acerca del total de número de contrataciones de este tipo y otros datos a partir del *Boletín de Estadísticas Laborales* y del *Anuario de Estadísticas Laborales* citados, aunque sin posibilidad de obtener porcentajes significativos y por tanto válidos, sobre el incremento de la temporalidad durante aquel tiempo.

Pese a esta importante circunstancia constituye el principal instrumento con el que acercarnos a la realidad laboral. Estructurada en cinco grandes campos –1.- Población en viviendas familiares; 2.- Activos; 3.- Ocupados; 4.- Parados; y 5.- Inactivos– están a disposición los principales resultados nacionales, autonómicos y provinciales desde 1976 hasta 1987, y a partir de esa misma fecha se cuentan con los resultados detallados a múltiples niveles. Con programas informáticos como el PC-Axis se pueden obtener de forma precisa y detallada, las principales macromagnitudes y sus posibles disgregaciones a partir del empleo de microdatos. Asimismo la labor llevada a cabo desde los años noventa por parte del Consejo Superior de Estadística (CSE)⁶⁸¹ –así como de la Comisión Interministerial de Estadística *ad hoc*⁶⁸²– y tiempo más adelante del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Coyunturales del Mercado de Trabajo –dependiente del propio CSE– devendría en vital en la revisión y homogeneización de las series la EPA⁶⁸³. Un trabajo en lo que aquí nos interesa se concentró en la revisión de las series entre 1976 a 1987, sobre la que existe una abundante bibliografía así como series históricas consolidadas y aceptadas por la comunidad científica⁶⁸⁴.

⁶⁸⁰ Véanse junto con los trabajos previamente citados en notas anteriores así como los firmados por, ALONSO BORREGO, César y ALBA RAMÍREZ, Alfonso, “Tipo de contrato y empleo en el ciclo económico, 1987-1996”, *Papeles de Economía Española*, nº 72, (1997), pp. 231-249; GARCÍA SERRANO, Carlos y ARRANZ MUÑOZ, José, “¿Qué ha sucedido con la estabilidad del empleo en España?: un análisis desagregado con datos de la EPA (1987-2003)”, *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 4, (2004), pp. 1-80. Y también: FINA, Lluís y TOHARÍA, Luis (coords.), *El empleo en España: situación y perspectivas*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001. Desde otra perspectiva: DOLADO, Juan J., GARCÍA-SERRANO, Carlos F. y JIMENO, Juan F., “Drawing Lessons from...”, *op.cit.*. Y asimismo para los años anteriores a nuestro periodo de investigación: ALBARRACÍN, Jesús, *Las tendencias básicas de la población, el empleo y el paro en el periodo, 1964 a 1980*, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1982; así como el informe, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMERCIO, *Análisis de las estadísticas del mercado de trabajo (1976-1980)*, Madrid, Ministerio de Economía y Comercio / Secretaria General Técnica, 1982.

⁶⁸¹ Se creara por el Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, *por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Superior de Estadística* [B.O.E. 8 de agosto de 1990].

⁶⁸² Real Decreto 1036/1990, de 27 de julio, *por el que se regula la naturaleza, funciones, composición, organización y funcionamiento de la Comisión Interministerial de Estadística* [B.O.E. 8 de agosto de 1990].

⁶⁸³ Entre otros informes publicados nos remitimos a, CONSEJO SUPERIOR DE ESTADÍSTICA / GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS COYUNTURALES DEL MERCADO DE TRABAJO, *Comparación de datos de empleo y paro (documentos aprobados en el pleno del Consejo Superior de Estadística del 3 de noviembre de 1999)*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1999.

⁶⁸⁴ Primero, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Encuesta de Población Activa: series revisadas, 1976-1987*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1988; id., *Encuesta de Población Activa: series revisadas, 1976-1987*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1990. Véase también el informe: “Nota sobre el enlace provisional de las series laborales tras la reforma de la Encuesta de Población Activa en el segundo trimestre de 1987” en TOHARÍA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, *op.cit.*, vol. III, pp. 1185-1208; y dentro de ese mismo volumen colectivo: MURGUI IZQUIERDO, Juan Santiago, MURO, Juan de Dios y URIEL JIMÉNEZ, Ezequiel, “Correcciones de las estimaciones de la Encuesta de Población Activa mediante la utilización de encuesta repetida” (pp. 1327-1376).

El segundo gran punto de apoyo en este sentido lo han constituido las amplísimas bases de datos procedentes de la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat⁶⁸⁵. Pese a que sería especialmente a partir de 1986 con la entrada en España en la CEE cuando el proceso de integración y normalización estadística se intensificaría, desde hacía años desde el INE ya se había iniciado el mismo. Un hecho, además, que estaría detrás de más de un cambio metodológico en la EPA como a continuación veremos.

Integrada plenamente hoy la Contabilidad Nacional el Sistema Estadístico Europeo⁶⁸⁶, no obstante, para los años en que nos movemos se deben afrontar –o al menos tener presentes– varios obstáculos, en especial los relacionados con la sincronía temporal –por ejemplo, el paso de la UE 12 a UE 15– a la hora de establecer los marcos comparativos precisos. A pesar de que Eurostat no escaparía a más de un escándalo⁶⁸⁷, la calidad y fiabilidad de sus bases de datos están fuera de toda duda –siempre y cuando se mantenga la perspectiva “de clase” apuntada–. Sucede aquí, al igual que en lo referente a los datos del INEM en comparación con los de la EPA en relación al número de parados, que Eurostat aplica otros baremos y metodología⁶⁸⁸, que, por ejemplo y sin salirnos de la contabilidad de los desempleados, tiende a ofrecer sistemáticamente cifras menores que la propia Encuesta de Población Activa. Como sucede igualmente con los datos de la temporalidad laboral⁶⁸⁹.

Para nuestro caso, se han empleado especialmente las siguientes estadísticas integradas en el apartado “Population and social conditions”: *Labour Force Survey*, *Income Social Inclusion and Living conditions* y *Social Protection*. También de notable interés han resultado numerosos informes que desde los años ochenta han retratado el lento como desigual proceso de convergencia europea, destapando a su vez las notables diferencias de todo orden entre España y la Unión Europea. Entre otros cabría citar *Statistical panorama of Europe*⁶⁹⁰, *Retrato social de Europa*⁶⁹¹, *Europa de los quince: cifras claves*⁶⁹², *Measuring progress towards a more*

⁶⁸⁵ epp.eurostat.ec.europa.eu.

⁶⁸⁶ GÓMEZ del MORAL, Mariano, “La armonización estadística en el mercado del Sistema Estadístico Europeo (SEE)”, *Índice: revista de Estadística y Sociedad*, nº 16, (2006), pp. 12-14; y, RUBIO SANZ, Mª Teresa, “La contabilidad nacional de España en el marco del sistema estadístico europeo”, *Revista de Estudios Europeos*, nº 43, (2006), pp. 99-117. Sobre su funcionamiento, metodología y legislación: www.ine.es/ine/see/see_inicio.htm.

⁶⁸⁷ Noticia, “La Eurocámara pide la comparecencia de Prodi por el escándalo Eurostat”, *ABC*, 17 de julio de 2003.

⁶⁸⁸ OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *Estadísticas de empleo: métodos y definiciones*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1989. Y desde una perspectiva eminentemente jurídica: OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES / EUROPEAN COMMISSION, *Legal framework for European statistics: the statistical law*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2010.

⁶⁸⁹ GIRÁLDEZ NÚÑEZ, Mª Teresa y ALLONA ALBERICH, Mª Dolores, “La medición del empleo y el paro en España y la Unión Europea”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 148-149, (1999), pp. 33-55; GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Clara Isabel y SENRA DÍAZ, Eva, “Employment and unemployment data: Differences between EPA and other Official Statistics”, *Boletín de Estadística e Investigación Operativa*, vol. XXVI, nº 3, (2012), pp. 208-210.

⁶⁹⁰ OFFICE FOR OFFICIAL STATISTICAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *Statistical panorama of Europe*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1984.

⁶⁹¹ OFICINA DE ESTADÍSTICAS OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *Retrato social de Europa*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1991.

⁶⁹² COMISIÓN EUROPEA / EUROSTAT, *Europa de los quince: cifras claves*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000. Véase aquí asimismo, EUROPEAN COMMISSION / EUROSTAT, *Information society statistics: pocketbook*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2001.

*sustainable Europe*⁶⁹³... trabajos estadísticos que han dado lugar a no pocos estudios comparativos de primer orden⁶⁹⁴.

¿Hasta qué punto gobiernos, administraciones, instituciones... tienen un interés real – medido en términos de voluntad política– en mejorar la calidad y fiabilidad de las encuestas de todo tipo y especialmente las relacionadas con el mercado de trabajo? Este interrogante, quizás, puede resultar chocante así como pueda llegar a contravenir ciertas lógicas preestablecidas. Ahora bien, a tenor de lo que sucedió en nuestro caso cabría llegar a plantear varias hipótesis de trabajo. Así pues, acercarnos a los diferentes cambios metodológicos de la EPA y las propias estadísticas del INEM durante los años ochenta y los primeros noventa, puede llegar a resolver la citada pregunta.

Ha sido común, por lo demás, hablar de un “proceso de renovación y metodología constante” de la EPA⁶⁹⁵. Todo ello en un tono neutro a la par que descriptivo cuando no de claro corte académico-institucional⁶⁹⁶. Y, sin embargo, aproximarse –insistimos una vez más– a los cambios metodológicos de la Encuesta de Población Activa no es viable –ni aconsejable– sin interrogarnos por la dirección de los mismos, así como el contexto histórico en que se inscriben. Otro tanto se puede decir de las estadísticas del INEM –hoy Servicio Público de Empleo Estatal⁶⁹⁷– quienes no escaparían a las continuadas críticas en torno a elaboración y presentación

⁶⁹³ EUROPEAN COMMISSION / EUROSTAT, *Measuring progress towards a more sustainable Europe: proposed indicators for sustainable development: data 1980-99*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2001. Y, EUROPEAN COMMISSION/EUROSTAT, *Enterprises in Europe: data 1987-97: sixth report*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2001. También: EUROPEAN COMMISSION / EUROSTAT, *Living conditions in Europe: statistical pocketbook: data 1998-2002*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2003.

⁶⁹⁴ Véase al respecto, además de la bibliografía que en siguientes capítulos se empleará, PIEDRAFITA, Sonia, STEINBERG, Federico y TORREBLANCA, José Ignacio, *20 años de España en la Unión Europea (1986-2006)*, Madrid, Real Instituto Elcano / Parlamento Europeo-Oficina de España, 2006.

⁶⁹⁵ RODRÍGUEZ CABALLERO, Juan Carlos, “La información estadística sobre el mercado de trabajo en España”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, n° 71, (2008) p. 69. Véase igualmente las siguientes aportaciones que se citan: MIRÁS AMOR, Julio, “Estadísticas sobre la actividad económica de la población. La Encuesta de Población Activa”, *Situación: revista de situación económica*, n° 3, (1992), pp. 75-82; MALDONADO JURADO, Juan A. y GONZÁLEZ AQUILERA, Silvia, “La desagregación de datos y la precisión en las estadísticas públicas: la Encuesta de Población Activa (E.P.A.)” en PASCUAL ACOSTA, Antonio, MARTÍNEZ ALMÉCIJA, Alfredo y MUÑOZ GARCÍA, Joaquín (eds.), *Tamaño de muestra y precisión estadística*, Almería, Universidad de Almería, 2004, pp. 269-286. E igualmente: PORRAS SÁNCHEZ, Manuel y RUFÍAN LIZÁN, Antonio, “La Encuesta de Población Activa: aspectos metodológicos”, *Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, n° 1, (1996), pp. 113-116.

⁶⁹⁶ José Ignacio Pérez Infante, probablemente, el mayor especialista en la cuestión no tendría problemas en afirmar lo siguiente: «Desde la perspectiva conceptual y de los colectivos considerados, el paro de la EPA sigue estrictamente los criterios internacionales definidos por las distintas Conferencias de Estadígrafos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la normativa de la Comisión Europea que regula la Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo (EFT) de la Unión Europea, a la que debe ajustarse las distintas encuestas de los Estados miembros de la Unión incluidas en la EFT, entre ellas la EPA española». PÉREZ INFANTE, José Ignacio, “¿Por qué el...”, *op.cit.*, p. 54.

⁶⁹⁷ Aunque popularmente se le sigue conociendo como el INEM, en el año 2003 se convertiría en el SEPE a través de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, *de Empleo* [B.O.E. 17 de diciembre de 2003]. En primer lugar, véanse a continuación dos informes: TOHARIA, Luis, PRUDENCIO, Claudio A. y PÉREZ INFANTE, José Ignacio, *La ocupabilidad de los parados registrados*, [Madrid], Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / INEM-SEPE, 2006; y, SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, *La calidad de la formación continua a nivel europeo: estándares e indicadores*, [Madrid], Servicio Público de Empleo Estatal [2006]. Al respecto también: HERNÁNDO SÁNCHEZ, Antonio, “La nueva estadística de

de sus propios datos, a lo que se sumaría las permanentes denuncias del mejorable funcionamiento del propio Instituto Nacional de Empleo durante la década de los ochenta y noventa⁶⁹⁸. Por tanto, cabría al menos preguntarse, si tales cambios fueron voluntarios o no, o por el contrario, tuvieron que ver con procesos de adaptación a la normativa internacional procedente tanto de la OIT y de la UE. Y a partir de ahí interrogarse por cómo y de qué forma se adaptaron.

Desde su creación hasta el presente las estadísticas tanto de la Encuesta de Población Activa como del Instituto Nacional de Empleo han sufrido innumerables modificaciones⁶⁹⁹. De mayor o menor alcance, las mismas han transcurrido, en paralelo, a un lento proceso de adaptación a la realidad sociedad económica española, todo ello en relación, las más de las veces, con el proceso de normalización y armonización con el contexto internacional. En relación a la EPA, dos relevantes cambios se producirían antes de la llegada de los socialistas al poder. El primero en 1972 cuando se mejoraría el muestreo de cara a reflejar con mayor exactitud las personas que formaban parte de las viviendas familiares. En 1976 cuando la crisis económica lleva instalada en la economía cerca de tres años, se volvería a alterar la EPA de cara a recoger con más precisión una realidad socioeconómica con cada vez mayor presencia: el desempleo entonces considerado todavía como un fenómeno no estructural.

Ahora bien, ya en tiempos socialistas su primera contribución a las estadísticas del mercado de trabajo no tendría por objeto las de la EPA sino las del INEM. Tras dos años escasos en el Gobierno se publicaría la Orden de 11 de marzo de 1985, *por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado*⁷⁰⁰. Promulgada por el Ministerio de

demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal” en MARCOS GARCÍA, Carmen (dir.), *El papel de los registros administrativos en análisis social y económico y el desarrollo del sistema estadístico*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2006, pp. 363-380. Señalar también la mejora continua por parte del SEPE del llamado “Observatorio de las Ocupaciones”: www.sepe.es/contenido/observatorio/observatorio.html.

⁶⁹⁸ Por su parte el INEM se crearía a través del Real Decreto-Ley 16/1978, de 16 de noviembre, *sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo* [B.O.E 18 de noviembre de 1978]. Las críticas a su funcionamiento vendrían tanto por parte de empresarios como de trabajadores: por parte empresarial, SÁNCHEZ FERRO, Julio, “Consideraciones empresariales sobre el funcionamiento de servicio de empleo a cargo del INEM” en INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM), INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IELSS), DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, *Jornadas Europeas sobre Servicios Públicos de Empleo y Política de Empleo: Madrid, 12-16 de diciembre de 1983*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984, pp. 141-148; por parte sindical, LILLO PÉREZ, Enrique, “Nuevos fines para la concertación social. El proyecto de reforma del INEM como ejemplo de un fracaso de modelo” en *Transformaciones del derecho del trabajo: nuevas formas de empleo y concertación social. Primeras jornadas interuniversitarias Barcelona-Toulouse. Barcelona, 2 y 3 marzo 1989*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1991, pp. 387-398. Sobre la imagen del INEM, MASSANA, Eva, “Imagen del INEM en los empresarios y perfil del personal contratable” en COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID (ed.), *Psicología, trabajo, organización y nuevas formas de empleo: 1º Congreso Iberoamericano y 3º Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones: Madrid, 23-26 marzo 1988*, II vols., Madrid, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 1988, vol. I, *Libro de simposios*. Por último, TRIGO PORTELA, Joaquín, “La reforma del INEM y el mercado de trabajo en España” en *El mercado de trabajo español: reforma y creación de empleo*. Dossier monográfico, *Boletín del Círculo de Empresarios*, n° 57, (1993), pp. 253-272; y, RODRÍGUEZ RAMOS, Mª José, “El funcionamiento de los servicios de empleo y la reforma del INEM” en QUESADA SEGURA, Rosa (coord.), *Lecciones de derecho del trabajo*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, pp. 405-456.

⁶⁹⁹ Consúltese el propio informe del, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *La organización estadística en España*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística [s/f] [www.ine.es].

⁷⁰⁰ Orden de 11 de marzo de 1985, *por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado* [B.O.E. 14 de marzo de 1985]. Véase asimismo el pequeño informe publicado en su momento acerca cómo el INEM había generado toda una serie de mecanismos internos para a partir de la citada *Orden* alterar el registro de parados: CCOO, “Criterios que utiliza el INEM para cambiar a los parados en el Registro”. Consultable en, ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel,

Trabajo y Seguridad Social en tiempos de Joaquín Almunia, y a pesar de las numerosas críticas que acapararía tanto en su mismo presente histórico como con el paso de los años, la misma continúa hoy vigente⁷⁰¹.

Examinar tal normativa en su contexto histórico puede proporcionar significativas claves. Tras más de una década de crisis económica y superado el primer bienio de los ejecutivos socialistas, las tasas de paro no sólo habían marcado records no conocidos en la reciente historia contemporánea, sino que aquellas cifras no dejaban de crecer mes a mes. Todo un problema, tanto para la credibilidad política de los ejecutivos socialistas, como de cara asegurar la legitimidad tanto social como económica de su proyecto de modernización económica. Pero no sólo, pues la Orden de 11 de marzo de 1985 llegaría tan sólo unos meses después de la puesta en marcha del paquete legislativo de la RET'84. Como se preveía y habían avisado los expertos y técnicos, la aprobación de las políticas flexibilizadoras –con la contratación temporal de fomento como principal medida– reforzaría a corto plazo, hasta la presumible pronta salida de la crisis económica, el proceso de reajuste interno de plantillas que venía produciéndose desde hacía años. De esta forma, los socialistas se ponían la venda antes que la herida del desempleo seguiría sangrando y desangrándoles y reducir en la medida de lo posible el fatídico como cíclico momento de los primeros días de cada mes cuando se conocían las cifras del paro y se tenían que ofrecer las correspondientes explicaciones.

¿Qué venía a decir tal Orden ministerial? En lo básico, y tal y como se señalaba en su *Exposición de motivos*, se justifica tal decisión técnica a la par que política, bajo tres argumentos cuando menos debatibles: primero, se volvía a la hipótesis –ya vista– del supuesto impacto que habían tenido la apertura de las oficinas del INEM en la alta tasas de desempleo; segundo, se señalaba la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades laborales en clara relación con la RET'84 y al propio proceso de reconversión industrial; y en tercer lugar, se hablaba de la necesidad de adaptación a la normativa europea de la CEE. Si el primer argumento esgrimido había que situarlo en el campo de la mera hipótesis política antes que económica, el segundo en el campo de las nuevas realidades sociolaborales, el tercero se constituiría en una explicación que no guardaba relación con la realidad estrictamente dicha, pues tal proceso de armonización no se llevaría adelante y con todas sus consecuencias hasta dos años después y no de forma completa hasta tiempo más tarde. De hecho, se omitía que España todavía no pertenecía a la entonces CEE y por lo tanto no tenía obligación legal alguna al respecto. Es decir, se trataba, en parte, de un argumento a la “galería”. Como también se omitía intencionadamente que la única “obligación” real la constituía la Recomendación número 166 de la OIT sobre la terminación de la relación del trabajo de 1982⁷⁰², y que no casualmente sería ratificada un mes después, en concreto, el 26 de abril de 1985. En cualquier caso, conviene detenerse en su propia *Exposición de motivos*:

«Las modificaciones producidas en los últimos años en la naturaleza y condiciones del mercado de trabajo, la penetración creciente de las Oficinas de Empleo entre los diferentes colectivos de demandantes de empleo, los cambios normativos e institucionales introducidos recientemente y los efectos de los procesos de reconversión industrial y sectorial, así como la necesidad de adaptar los criterios estadísticos relacionados con la medición del paro registrado a los generalmente aplicados en la Comunidad Económica Europea, hacen preciso dictar una norma claramente a efectos estadísticos el concepto de paro registrado, al mismo tiempo que lo adecue a las circunstancias señaladas anteriormente».

Ayer, hoy y mañana del 14-D, Madrid, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 1990, pp. 251-252.

⁷⁰¹ Véase, Noticia, “El Ministerio de Trabajo dicta una nueva normativa para contabilidad el paro registrado”, *El País*, 14 de marzo de 1985. Un mes antes ya había saltado a la prensa la siguiente, Noticia, “Trabajo elimina de las estadísticas de desempleo a los mayores de 55 años”, *El País*, 16 de febrero de 1985.

⁷⁰² ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, “Recomendación n° 166 sobre la terminación de la relación del trabajo”, aprobada en la Sesión de la Conferencia n° 68 celebrada el 2 de junio de 1982 [www.ilo.org].

Lejos de los argumentos esgrimidos en aquella Orden ministerial, su objetivo real sería reducir de forma considerable el número de parados. A partir de entonces, la contabilidad del “paro registrado” se realizaría en base a las demandas de empleo en alta registradas por el INEM, con las siguientes y numerosas exclusiones: a) Las situaciones de pluriempleo; b) “Personas que, estando ocupadas, demandan otro empleo para cambiarlo por el que ocupan”; c) “Trabajadores inscritos en las oficinas de empleo que, en virtud de un expediente de regulación de empleo, tienen suspendidos temporalmente sus contratos”; d) “Demandantes registrados que tengan reducida la jornada ordinaria de trabajo por resolución de la autoridad competente, dictada en expediente de regulación de empleo o por modificación de las condiciones de trabajo”; e) “Perceptores de prestaciones económicas por desempleo que participan en los trabajos de colaboración social previstas por el capítulo V del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo”; f) “Personas inscritas en las Oficinas de Empleo que son pensionistas de jubilación o que tienen sesenta y cinco o más años”; g) “Demandantes de un empleo coyuntural por periodo inferior a tres meses”; h) “Demandantes de un trabajo cuya jornada semanal es inferior a las veinte horas”; i), “Demandantes que estén cursando estudios de enseñanza oficial reglada, siempre que sean menores de veinticinco años o que, superando dicha edad, sean demandantes de primer empleo”; j) “Demandantes de cursos de formación profesional ocupacional, cuando sus horas lecturas superen las veinte semanales, tengan una beca de manutención y sean demandantes de primer empleo”; k) “Otros demandantes: Demandantes en situación de incapacidad laboral transitoria o de baja médica; pensionistas por invalidez absoluta o gran invalidez; jóvenes que estén cumpliendo el servicio militar o prestación sustitutoria del mismo personas que se inscriben a las Oficinas de Empleo como requisito previo para participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo determinado y solicitantes de un empleo exclusivamente para el extranjero o de un empleo a dominación”; y l), “trabajadores beneficiarios del subsidio agrario”.

Como se puede leer los colectivos de desempleados excluidos no fueron pocos, a través de una decisión política antes que técnica o que al menos guardara relación con una supuesta mejora de la calidad o fiabilidad de las estadísticas de empleo⁷⁰³. Por este mismo camino, y tal como denunciaría en su día Agustín Moreno se eliminaron de las “listas del INEM” a más de 800.000 desempleados⁷⁰⁴. Pero además aquel cambio metodológico coincidiría, en breve, con la fase de recuperación económica, que se iba a traducir en un lento proceso de creación de puestos de trabajo en el siguiente lustro. Lo anterior, sin duda, tendría la virtud no sólo de reducir el mencionado problema estadístico sino de ofrecer la oportunidad política –real pero también ficticia– de presentar los “logros” de la modernización socialista como un éxito atribuible a las políticas emprendidas. Y pese a lo anterior, rara sería la ocasión en donde no faltarán las pertinentes denuncias de maquillaje o directamente manipulación de las estadísticas de empleo, pese a tales “cambios metodológicos”.

Volviendo a los *vaivenes* por los que atravesaría la EPA, su principal cambio en la época socialista tendría lugar en 1987. El mismo ha sido calificado por la mayoría de los especialistas como uno de los principales habidos e incluso se llegaría a hablar de “ruptura

⁷⁰³ Consúltase al respecto, por otro lado, los diversos informes publicados por el propio INE entre 1983 a 1999 en relación a lo que denominaría como la *evolución de la calidad de la EPA*: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Evolución de la calidad de los datos de la Encuesta de Población Activa*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1983-1999. También: CRISTÓBAL CRISTÓBAL, Alfredo, “La Encuesta de Población Activa y la Contabilidad Nacional de España”, *Índice: revista de estadística y sociedad*, nº 11, (2005), pp. 16-17. Y desde otra perspectiva: CONSELL ECONÓMIC DE LES ILLES BALEARS, *Indicadors de qualitat del treball*, Palma de Mallorca, Consell Econòmic de les Illes Balears, 2008.

⁷⁰⁴ MORENO, Agustín, “El Gobierno en el país de las maravillas”, *El País*, 11 de agosto de 1988.

metodológica”⁷⁰⁵. Interesa, por tanto, detenerse en su contenido como en sus objetivos y direcciones.

Ratificada la recomendación número 166 de la OIT e integrada España en la CEE un año antes, la EPA se adaptaría en este caso a los criterios de la *Labour Force Survey*. Con tal cambio metodológico se procedería a la elaboración de un nuevo cuestionario que, en primer lugar, vendría a incorporar algunas nuevas realidades laborales: los contratos temporales o a tiempo parcial, así como cuestiones relacionadas con la formación dentro de la empresa o inclusive las condiciones que en un demandante aceptaría un puesto de trabajo. Modificaciones que no sólo enriquecerían la información y calidad de la misma, sino que posibilitaría desde entonces calcular y verificar el nacimiento de la “cultura de la temporalidad”. Igualmente, la revisión del cuestionario así como su informatización viabilizarían obtener una mayor información sobre la composición de los hogares. Por otro lado, también se procedería a la revisión de las anteriores series desde 1976, obteniéndose a partir de entonces una serie homogéneas que son las que se emplean, precisamente, en este mismo trabajo.

No obstante, con los cambios del año 1987 también se alteraría de forma significativa la contabilidad de los activos y parados. Sin proceder a un cambio tan explícito como burdo como el del año 1985, la dirección, de cualquier forma, seguiría el mismo patrón a efectos prácticos: una reducción de la población desempleada. ¿Cómo se procedió en aquella ocasión? Veamos, primero, los rigurosos criterios para ser considerado como “población parada” por la EPA, que describiría José Ignacio Pérez Infante, quien a la postre sería entre 1985-1990, Director General de Empleo:

«[L]a población parada de la EPA comprende a las personas con edades entre 16 y 74 años que cumplen simultáneamente los tres requisitos siguientes:

No tener empleo por cuenta propia o ajena en la semana de referencia (la anterior a la de la entrevista), lo que implica no haber trabajado ni siquiera una hora dicha semana.

Buscar empleo en las cuatro semanas anteriores (a la de la entrevista), lo que significa que en ese período hayan tomados medidas para conseguir un trabajo como asalariado o hayan realizado gestiones para establecerse por su cuenta.

Estar disponible para trabajar o, lo que es lo mismo, que estén en condiciones en el plazo de las dos semanas siguientes».

De esta forma, el cambio metodológico que se opera en la EPA en 1987 tendría la virtud, o mejor dicho el deseado como buscado *efecto estadístico*, de, al mismo tiempo, incrementar la población activa y ocupada a la par que reducir los parados e inactivos⁷⁰⁶. Para ello se operaría de la siguiente forma: primero, eliminar la entonces diferenciación entre los ocupados y los considerados “activos marginales”, a quienes desde entonces se les excluye como parados; segundo se amplía el tiempo de referencia de una a cuatro semanas para aquellos sujetos parados que busquen trabajo; y tercero se fija en quince días la disponibilidad de incorporarse a un trabajo⁷⁰⁷.

Así pues, entre las modificaciones en torno al “paro registrado” en las estadísticas del Instituto Nacional de Empleo y los cambios del año 1987 en la Encuesta de Población Activa, estar englobado en la categoría de parado o inactivo no resultaría sencillo al tenerse que cumplir al mismo tiempo y de forma simultánea, no pocas condiciones y requisitos y establecerse, a su vez, importantes exclusiones.

⁷⁰⁵ Véanse los trabajos apuntado en la *nota 676*.

⁷⁰⁶ Sobre esta misma cuestión consúltese el elaborado informe de, CUADRADO, Pilar, LACUESTA, Aitor, MARTÍNEZ, José M^a y PÉREZ, Eduardo, “El futuro de la tasa de actividad española: un enfoque generacional”, *Documentos de Trabajo del Banco de España*, nº 0732, (2007).

⁷⁰⁷ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Encuesta de Población Activa. Descripción de la encuesta, definiciones e instrucciones para la cumplimentación del cuestionario*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1987.

En los siguientes años se producirían otras tantas modificaciones que en su mayor parte continuarían el “camino” emprendido. Así dos años después con la publicación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, *de la Función Estadística Pública* no sólo el INE pasaba a convertirse en un organismo autónomo, sino que también se reforzaba su potestad legal⁷⁰⁸. A partir de la citada Ley 12/1989 todos los ciudadanos –nacionales y extranjeros– residentes tendrían la obligación de contestar a los cuestionarios de forma “veraz” y “exacta”, así como se establecía un marco sancionador en caso de incumplimiento. En 1992 se alteraría nuevamente la EPA ampliando su tamaño en 65.000 las familias encuestadas, e incrementado la información en torno a las condiciones laborales como a la población extranjera⁷⁰⁹. En los dos años siguientes, se comenzaría a emplear la llamada “Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93)”⁷¹⁰ y a partir del segundo trimestre de 1994, la “Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94)”⁷¹¹, lo que tendría no pocas consecuencias en la nueva lectura de las condiciones socioeconómicas de la población asalariada⁷¹². En ese mismo año, y una vez dados por definitivos los datos del Censo de Población de 1991 se ajustarían los mismos a la EPA en una nueva serie de proyecciones⁷¹³. Su consecuencia más inmediata sería tanto el rejuvenecimiento de la población como la elevación de la población activa.

Aunque ya fuera nuestro marco temporal de investigación, desde aquel entonces hasta el presente otras tantas modificaciones de calado se han llevado a cabo. En general, han tenido por lo común las citadas modificaciones continuar con el proceso de armonización de la legislación a los criterios de Eurostat y de la OIT. Así por ejemplo, en 1999 se modificaría, nuevamente, la EPA en relación al concepto de subempleo de cara a adaptar la misma a la “Resolución sobre la medición de los ingresos relacionados con el empleo”, que se adoptaría durante la 16ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo celebrada en octubre de 1998⁷¹⁴. En todo

⁷⁰⁸ Ley 12/1989, de 9 de mayo, *de la Función Estadística Pública* [B.O.E. 11 de mayo de 1989]. Unos años más tarde este proceso finalizaría con la aprobación del Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, *por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Estadística* [B.O.E. 12 de mayo de 2001]. Más tarde modificado por el Real 947/2003, de 18 de julio, *por el que se modifica el Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Estadística*. Dentro de este marco jurídico se ha de tener presente también la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, *de Presupuestos Generales del Estado para 1990* [B.O.E. 30 de junio de 1990], y finalmente diversos artículos de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, *de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social* [B.O.E. 31 de diciembre de 1996].

⁷⁰⁹ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Encuesta de Población Activa 1992: descripción de la encuesta, definiciones e instrucciones para la cumplimentación del cuestionario*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1991.

⁷¹⁰ Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, *por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93)* [B.O.E. 22 de diciembre de 1992]. Una normativa que venía a adaptar el Reglamento (CEE) nº 3037/90, del Consejo, de 9 de octubre de 1990, *relativo a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea* [D.O.U.E. 24 de octubre de 1990]. Véase por último, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Estructura de la clasificación nacional de actividades económicas 1993: (CNAE-93)*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1992.

⁷¹¹ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Encuesta de Población Activa. Series homogéneas CNO-94: 3º trimestre 1976 a 4º trimestre 1993*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1994 [www.ine.es].

⁷¹² Léase el informe ‘oficial’ del, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *La condición socioeconómica en la Encuesta de Población Activa*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1996.

⁷¹³ GÓMEZ SALVADOR, Ramón y GARCÍA PERA, Pilar, “Elaboración de series históricas de empleo a partir de la Encuesta de Población Activa (1964-1992)”, *Documentos de Trabajo del Banco de España*, nº 9, (1994), pp. 1-63.

⁷¹⁴ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, *La medición del subempleo. [Decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo]*, Ginebra, 6-15 de octubre de 1998, Informe I (ICLS/16/1998/I), Ginebra, 1998. Una actualización del estado de la cuestión en:

caso, mucho más importantes resultarían, por último, los cambios de los años 2002 y 2005. En relación al primero citado, aprobados tanto el Reglamento CE 577/98⁷¹⁵ y el Reglamento CE 1897/2000⁷¹⁶, más allá de las mejores técnicas se procedería a una enésima “vuelta de tuerca” de la consideración del parado⁷¹⁷. Pese a no modificar la definición de “parado”, si este no mostraba que había mantenido contacto con las oficinas de empleo con el objetivo de buscar empleo, pasaba a ser considerado como inactivo. Una medida que no sólo volvía a “relajar” las siempre problemáticas estadísticas sobre el empleo/desempleo, sino que hacía recaer sobre el sujeto una especie de “carga de prueba”, en tanto con la legislación anterior no pasaba a ser considerado como inactivo hasta tres meses después de su alta como demandante de empleo. Por último, en 2005 se produciría una nueva *ruptura metodológica* en la EPA⁷¹⁸. En base a las medidas normativas contempladas en el Reglamento CE 2257/2003⁷¹⁹ se llevaría cabo, en la práctica, la formulación de un nuevo cuestionario destinado, en lo básico, a la inclusión del entonces intenso fenómeno migratorio, lo que su vez conduciría a una revisión completa de las series entre 1996-2004. Pero también con aquel cambio se pretendió contemplar las nuevas realidades sociolaborales, en tanto en la recogida de datos se tendría en cuenta nuevas circunstancias, como si la persona en su trabajo supervisa la tarea de otros trabajadores, si tiene o no un contrato por una agencia temporal así como se preguntaba por el papel desempeñado por las oficinas de empleo⁷²⁰.

Pese a lo sintético de estos apuntes de orden no sólo metodológico sobre la evolución y devenir de las principales estadísticas del mercado de trabajo, queda, en cualquier caso, evidenciado la orientación y la voluntad política de la mayor parte de los cambios acontecidos en estos mismos años. Al igual que sucedería con las frecuentes críticas y denuncias acerca del maquillaje acerca de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, tanto las de la EPA como la del INEM nunca escaparían a las más fundadas sospechas de su manipulación o cuando menos alteración estadística, previo paso por la conocida “cocina”. Un planteamiento que se ha de tener muy presente, si se pretende, tal y como señalaron en su momento Darrel Huff e Irving Geis, emplear las estadísticas con “honradez y precisión” de cara a la construcción de un relato de lo histórico⁷²¹.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, *Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones: artículos 19, 22 y 35 de la Constitución. Informe III (Parte Iª)*, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo, 2010. Y desde una perspectiva más técnica, BOLLÉ, Patrick, “Perspectivas. Novedades en las estadísticas del trabajo”, *Revista Internacional del trabajo*, vol. CXVIII, nº 1, (1999), pp. 75-92.

⁷¹⁵ Reglamento (CE) nº 577/98, del Consejo, de 9 de marzo de 1998, *Relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad* [D.O.U.E. 14 de marzo de 1998].

⁷¹⁶ Reglamento (CE) nº 1897/2000, de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, *por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad por lo que respecta a la definición operativa de desempleado* [D.O.U.E. 8 de septiembre de 2000].

⁷¹⁷ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Encuesta de Población Activa 2002: tratamiento de la información*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2002.

⁷¹⁸ GARCÍA, Miguel Ángel, “Cambios en la Encuesta de Población Activa en 2005”, *Índice: revista de estadística y sociedad*, nº 11, (2005), pp. 6-10. Por lo demás consúltese el trabajo del, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Encuesta de Población Activa. Metodología 2005. Descripción de la encuesta, definiciones e instrucciones para la cumplimentación del cuestionario*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2008 [www.ine.es].

⁷¹⁹ Reglamento (CE) nº 2257/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, *por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad para adaptar la lista a las características de la encuesta* [D.O.U.E. 23 de diciembre de 2003].

⁷²⁰ ALCAIDE, Carmen, “La nueva EPA”, *Economistas*, vol. XXIV, nº 108, (2006), pp. 225-227.

⁷²¹ HUFF, Darrel y GEIS, Irving, *Cómo mentir con..., op.cit.*

3. A vueltas con la historia social: debates, controversias y dilemas del historiador social hoy España

«El comercio de la historia tiene en común con el comercio de los detergentes el empeño en hacer pasar la novedad por la innovación».

Pierre VILAR, *Historia marxista, historia en construcción*¹.

«Es cierto que el marxismo logró posiciones de prestigio – nunca a salvo del fuego de fusilería de sus adversarios– y durante un tiempo influyó en la agenda de la historia social [...]. No conocemos, sin embargo, focos duraderos o irreductibles de irradiación marxista – historiográfica, se entiende– en las universidades occidentales, conservadas a buen recaudo por las escuelas tradicionales; los historiadores marxistas casi nunca dejaron de ser una activa y en ocasiones influyente minoría, por más que contribuyeran de manera profunda a las preocupaciones centrales del quehacer historiográfico».

José Antonio PIQUERAS, *El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales*².

Desde el anuncio de la crisis “oficial” de la historiografía obrerista clásica, a principios de los años ochenta del pasado siglo, numerosas han sido las esquelas aparecidas en monografías, artículos, encuentros científicos... Todo un conjunto de *alegatos* que con auténtica profusión, y añadiríamos *devoción*, han tratado de certificar el *fallecimiento* de esta línea de investigación³. *Crisis* que, a su vez, coincidiría en el tiempo con la transmutación de la “vieja” *cuestión social* y el “declive” del movimiento obrero como sujeto histórico pero también

¹ VILAR, Pierre, *Historia marxista, historia en construcción. Ensayo de diálogo con Althusser*, 2ª ed., Barcelona, Anagrama, 1975, p. 7.

² PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 68.

³ Retratos y estados de la cuestión sobre la ‘crisis’ de la historiografía social obrerista desde las más variadas *ópticas* en, PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Historia del movimiento obrero. Viejas fuentes, nueva metodología”, *Studia Historica*, vols. VI-VII, (1988-1989), pp. 7-15; FORCADELL, Carlos, “Sobre desiertos y..., *op.cit.*”; GABRIEL, Pere, “A vueltas y revueltas con la historia social obrera en España. Historia obrera, historia popular e historia contemporánea”, *Historia Social*, nº 22, (1995), pp. 43-53; URÍA, Jorge, “Sociología e historia. Una década de historia social en *Sociología del Trabajo*”, *Sociología del Trabajo*, nº 31, (1997), pp. 149-178; IBARZ, Jordi, “De lo concreto y lo general. Un estudio de caso del movimiento obrero y su práctica historiográfica” en ARENAS, Carlos, FLORENCIO, Antonio y MARTÍNEZ RUIZ, José Ignacio (coords.), *Mercados y organización del trabajo en España: siglo XIX y XX*, Sevilla, Atril, 1998, pp. 391-396; BARRIO ALONSO, Ángeles, “Historia obrera en los noventa: Tradición y modernidad”, *Historia Social*, nº 37, (2000), pp. 143-160; FORCADELL, Carlos, “Sindicalismo y movimiento obrero: La recuperación historiográfica de las clases trabajadoras” en ORTIZ HERAS, Manuel, RUIZ, David y SÁNCHEZ, Isidro (coords.), *Movimientos sociales y estado en la España contemporánea*, Cuenca, Universidad Castilla-La Mancha, 2001, pp. 243-264; GARCÍA PIÑEIRO, Ramón, “El obrero ya no tiene quien le escriba. La movilización social en el «tardofranquismo» a través de la historiografía más reciente”, *Historia del Presente*, nº 1, (2002), pp. 104-116; PIQUERAS, José Antonio A. y SANZ, Vicent, “The social History of Work in Spain: From the Primitive Accumulation of Knowledge to Offshoring”, *International Review of Social History*, vol. L, nº 3, (2005), pp. 467-483; o, CABRERA, Miguel Ángel, “Developments in Contemporary Spanish Historiography: From Social History to the New Cultural History”, *The Journal of Modern History*, vol. LXXVII, nº 4, (2005), pp. 988-1023. Un balance a nivel internacional en, LINDEN, Marcel van der, *Historia transnacional del trabajo*, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente UNED / Fundación Instituto de Historia Social, 2006.

político de primer orden⁴. Un cuestionamiento que se encuentra estrechamente relacionado, por lo demás, con las generalizadas críticas de entonces hacia la escuela marxista, hasta llegar a hacer desaparecer, en la práctica, cualquier rastro del materialismo histórico en la historiografía académica de nuestros días⁵. Adiós a las estructuras, adiós a los grandes paradigmas⁶.

Ahora bien, un breve repaso por lo acaecido durante este largo tiempo certifica los límites de la *ansiada* renovación. Todo ello tras más de treinta años de continuadas críticas en relación a un pretendido “modelo canónico”⁷. Incluso se llegaría hablar –con una rotunda falta

⁴ Sobre esta cuestión nos remitimos a lo dicho y referenciado en la *Presentación*.

⁵ Recuérdense aquí las críticas del propio Edward P. THOMPSON –*Miseria de la teoría*, Barcelona, Crítica, 1981– a obras como las de Louis ALTHUSSER –*Ideología y aparatos ideológicos de Estado*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1974; id., y BALIBAR, Etienne, *Para leer “El capital”*, 12ª ed. México, Siglo XXI, 1976– o sin ir más lejos a las de Marta HARNECKER –*Los conceptos elementales del materialismo histórico*, 38ª ed., Madrid, Siglo XXI, 1977–. Unas críticas que con el tiempo han querido ser leídas más como la *defunción* de toda una escuela, antes que como un debate abierto a contrastes y discusiones dentro del marxismo. Ciertamente es que, desde entonces, los *seguidores* de Louis Althusser han sido escasos y que poco ha quedado de su legado –un último intento de revisión en, ÍPOLA, Emilio de, *Althusser, el infinito adiós*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007–. Pero de ahí a pasar por alto toda la literatura producida sobre las últimas aportaciones del materialismo histórico media un abismo. Un *abismo* que en el caso de la historiografía española se ha convertido en un *principio de realidad*. A modo de ejercicio de contraste, cabría revisar las bibliografías que ahora se entregan a los alumnos de Historia en las universidades del país. En cierta medida es como si la numerosa bibliografía acumulada en los años ochenta hasta la actualidad, simplemente, fueran *reliquias* de un pasado a no remover ni recordar ni mucho menos a citar en el presente. Lecturas acerca de este proceso en, JONES, Gareth St., “El proceso de la configuración histórica de la clase obrera y su conciencia histórica”, *Historia Social*, nº 17, (1993), pp. 115-129; PALMER, Bryan D., “La teoría crítica, el materialismo histórico y el supuesto fin del marxismo: retorno a *La miseria de la teoría*”, *Historia Social*, nº 18, (1994), pp. 125-151. Igualmente, VILAR, Pierre, *Historia marxista, historia...*, *op.cit.*; ANDERSON, Perry, *Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson*, Madrid, Siglo XXI, 1985; id., *Tras las huellas del materialismo histórico*, Madrid, Siglo XXI, 1986; la ya comentada de, COHEN, Gerald A., *La teoría de...*, *op.cit.*; y desde la última perspectiva apuntada, ROEMER, John E. (comp.), *El marxismo, una perspectiva analítica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989; ELSTER, Jon, *Una introducción a Karl Marx*, Madrid, Siglo XXI, 1991; ELSTER, Jon, *Making Sense of Marx*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994; así como la varias veces citada de, HERREROS VÁZQUEZ, Francisco, *Hacia una reconstrucción...*, *op.cit.*. Véase también lo apuntado en *Presentación*, nota 27.

⁶ Nos remitimos, una vez más, a, ARÓSTEGUI, Julio, *La investigación histórica...*, *op.cit.*, y en concreto al apartado titulado, “Las crisis de los grandes paradigmas”. Sobre la *crisis de la historia*, y los sus correspondientes lecturas durante la década de los años noventa, NOIRIEL, Gérard, *Sobre la crisis de la historia*, Madrid / Valencia, Cátedra / Universitat de València, 1997. Igualmente, se hace más que necesario tener presentes las aportaciones de, HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, *Tendencias historiográficas actuales: escribir historia hoy*, Madrid, Akal, 2004.

⁷ Por *modelo canónico* se entendió y se pretendió a su vez convertir la obra central de, TUÑÓN DE LARA, Manuel, *El movimiento obrero en la historia de España*, II vols., Barcelona, Laia, 1977 [Madrid, Taurus, 1972]. Junto con otras aproximaciones de los años setenta como fueron el caso de, TERMES, Josep, *Anarquismo y sindicalismo en España: La Primera Internacional (1864-1881)*, Barcelona, Ariel, 1972; IZARD, Miquel, *Industrialización y obrerismo: las tres clases del vapor, 1869-1913*, Barcelona, Ariel, 1973. Un antecedente de esta línea en, MARTÍ, Casimir, *Orígenes del anarquismo español*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1959. De este último autor véase, además, el estado de cuestión que planteó a principios a mediados de los setenta en pleno *auge* del ‘modelo canónico’ en, MARTÍ, Casimir, “Panorama de los estudios monográficos recientes sobre el movimiento obrero español” en TUÑÓN DE LARA, Manuel y BOTREL, Jean François (dirs.), *Movimiento obrero, política y literatura en la España Contemporánea [Coloquio del Seminario de Estudios de los siglos XIX y XX (4º. 1973. Pau, Gerona)]*, Madrid, Edicusa, 1974, pp. 27-52. Sobre los *significados, desarrollos y consecuencias* de la tradicionalmente considerada historia social clásica y su posterior crisis, junto con un completo estado de la cuestión, véase, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*. Por otro, recuérdense las continuadas críticas, algunas más

de seriedad— del *Tuñón's model*⁸, en lo que Pere Gabriel definiera como el clásico ejemplo de “cliché reduccionista de una historia social ideologizada, institucionalista y metodológicamente tradicional”⁹. Por lo demás, el origen del proceso de *revisión* —y añadiríamos de *rectificación*— se inauguraría con la publicación del conocido artículo de José Álvarez Junco y de Manuel Pérez Ledesma¹⁰. Comenzaba a andar la “segunda ruptura” como uno de los grandes *lugares comunes* de nuestra historiografía contemporánea¹¹. Luego vendrían otras tantas¹². Fueran

fundamentadas que otras, que desde su misma aparición acompañarían la siempre citada obra de Tuñón de Lara: FUSI, Juan Pablo, “Algunas publicaciones recientes sobre la historia del movimiento obrero español”, *Revista de Occidente*, n° 123, (1973), pp. 358-368; y la recensión de, OLÁBARRI, Ignacio, “El Movimiento Obrero en la Historia de España”, *Nuestro Tiempo*, n° 225, (1973), pp. 136-142. Por último consúltese el posterior balance personal que el propio Tuñón de Lara llevaría a cabo sobre la proclamada ‘segunda ruptura’ en, TUNÓN DE LARA, Manuel, “Última clase magistral de Manuel Tuñón de Lara en la Universidad del País Vasco” en GRANJA, José Luis de la y REIG TAPIA, Alberto (eds.), *Manuel Tuñón de Lara. El compromiso con la historia. Su vida y su obra*, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1993, pp. 447-455.

⁸ CABRERA, Miguel Ángel, “Developments in Contemporary..., *op.cit.*, p. 995. Allí el citado historiador evidenciaría su *obsesión anti-materialista*: «However, in contrast to the most mechanistic versions of historical materialism, Tuñón's model explains social phenomena by the reciprocal interaction between the different level. While the socioeconomic base is considered the most important explanatory variable, cultural and political changes are seen as more than just by-products of the changes experienced by that base». *Ibidem*.

⁹ GABRIEL, Pere, “A vueltas y..., *op.cit.*, p. 51, y continuaba diciendo: «Ahora bien, si al margen de clichés, y desde un cierto conocimiento de los antecedentes historiográficos [...] nos acercamos directamente, sin generalizaciones, a la mejor bibliografía concreta de estos años [...] podremos fácilmente constatar que el famoso cliché sólo es aplicable en unas pocas direcciones». *Ibidem*.

¹⁰ ALVAREZ JUNCO, José y PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Historia del movimiento obrero ¿Una segunda ruptura?”, *Revista de Occidente*, n° 12, (1982), pp. 19-42. Una revisión sobre el significado de esta ‘segunda ruptura’ un cuarto de siglo después en, BARRIO ALONSO, Ángeles, “Clase obrera y movimiento obrero: ¿Dos compañeros inseparables?” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*, pp. 83-104.

¹¹ Resulta de interés detenerse, aunque sea de forma sintética, en lo que allí venían a plantear, aun a fuerza de simplificar en exceso. Téngase, presente, la fecha de publicación del texto: el año de la victoria socialista, 1982. Álvarez Junco y Pérez Ledesma tras destacar como el «movimiento obrero [...] se ha convertido en un campo privilegiado de nuestra historia», advertían, al mismo tiempo, de que «su mismo apogeo anunciaba [...] una cercana decadencia». Así tras hablar del creciente desasosiego, y dado que el «consenso empieza a romperse», había llegado la hora de plantearse nuevos caminos. Destacada su necesaria aportación en su tiempo preciso, observaban como tras aquellos *libros de historia* muchos «eran, en buena medida, panfletos políticos». De esta forma, y dados los *nuevos tiempos*, tocaba interrogarse por sí «no ha llegado la hora de superar este ambiente intelectual de compromiso o militancia para centrarnos en la comprensión de la realidad». A partir de dónde vendría toda una serie de *fuertes críticas* contra ese *modelo de historia*. Primero, por una *question de méthode* —donde se resaltaba «la contradicción que se observa entre los pomposos alegatos metodológicos preliminares y la escasa renovación técnica que se detecta en el auténtico trabajo de investigación aportado»—. Segundo, estaba la «necesidad de multiplicar el esfuerzo ‘subjetivo’». Y tercero, por la inclinación de este tipo de obras por la *fascinación del poder*, que se visualizaba en cómo la «única biografía aceptable como ‘historia social’ es la de un líder obrero». En resumen, era el momento de desterrar el «carácter teológico de [aquella] historiografía». No terminarían ahí, pues, por el camino también criticarían la imprecisión en el uso de *términos*, el imperante *economicismo*, incluyéndose aquí a la obra de Tuñón de Lara. Textos, en suma, que habían terminado en «puras enumeraciones lineales de acontecimientos». En resumen, «el panorama de los estudios sobre el movimiento obrero español no puede ser más desolador». Y a partir de ahí venía la correspondiente *alternativa*: «Se ha escrito que ‘cada generación debe repensar la historia’. La nuestra ha sido precoz: ya lo hizo. Pero de forma apresurada, semi-clandestina y con una utilidad en gran medida política. ¿Quedaron ya —tan pronto— fijadas nuestras posiciones ideológicas? ¿No habría que pensar en una segunda ruptura, orientada ahora fundamentalmente por preocupaciones científicas? Ser infieles a nuestra juventud parece, en este caso, al menos una buena recomendación intelectual». Y, por otro, exponían su propuesta de investigación de la siguiente forma: «creemos que ha llegado la hora de intentar

antecedidas o no con el *post*, las propuestas e interpretaciones surgidas en torno a la historia social, no han dejado de buscar y certificar lo *nuevo* en la interpretación de lo social, de la sociedad.

Una búsqueda de lo *nuevo* que, como bien ha expresado el propio Manuel Pérez Ledesma muchos años después, ha terminado por convertirse en una actitud propia de la disciplina. Una actitud que ha conllevado el paso “de las certezas a las dudas, y del respeto a la tradición a la preocupación cada vez más generalizada por descubrir y discutir las últimas aportaciones”¹³.

Nos moveremos, a partir de aquí, en un doble terreno con sus sucesivas ramificaciones. A saber, tanto en el *teórico* como estrictamente en el *empírico*. Así pues, nos referiremos tanto a la evolución de la *Historia Social* –de entrada, sin más especificaciones– como en relación al transcurrir de la propia *Historia Social del Movimiento Obrero*.

Así pues, pocas de las llamadas *nuevas* aportaciones –principalmente reducidas al campo de lo teórico– han logrado asentarse dentro de la disciplina, y verse reconocidas como líneas de interpretación con peso dentro de la academia. No obstante, la primera división de la historiografía cuenta más que nunca con muchos invitados y pocos asientos. Así pues, en este proceso repleto de *idas y venidas*¹⁴, podemos –a fuerza de sintetizar y por tanto de simplificar–

comprender la evolución de las sociedades humanas en toda su complejidad, renunciando a todo esquematismo, así como a todo redentorismo y teleología [...]. De ahí que creamos que se puede seguir haciendo historia del movimiento obrero, pero con nuevas orientaciones». Ibídem, pp. 20, 21, 22-23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 37, 41 y 38, respectivamente.

¹² Aunque más adelante se volverá con detenimiento sobre esta cuestión, téngase ya presente que las dos propuestas de *nuevas rupturas* sobre la historia del movimiento obrero que más sonaron y suenan serían las siguientes: OLÁBARRI, Ignacio, *¿Lucha de clases o conflictos de intereses? Ensayos de historia de las relaciones laborales*, Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, 1991 [en concreto consúltese el capítulo titulado, “Las relaciones de trabajo en la España contemporánea: historiografía y perspectivas de investigación”, pp. 103-134]; y, CABRERA, Miguel Ángel, DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España contemporánea. Cambio social y giro cultural*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008, pp. 45-80. Si dejamos al lado las cuestiones políticas –implícitas o explícitas– que rodean a ambas propuestas –y que a diferencia del texto de Álvarez Junco y Pérez Ledesma no se explicitan [he aquí una primera nota a tener presente]– lo primero que sobresale es su alejamiento al materialismo histórico en sus diferentes acepciones y formulaciones. Dado que más tarde nos detendremos en extenso en el texto de Cabrera y sus discípulos; en relación al autor de *¿Lucha de clases o conflicto de intereses?* y a diferencia de la historia postsocial y/o postobjetivista, cuando menos tiene presente la necesidad de historiar el mundo de trabajo a partir de lo que él denomina las “relaciones laborales”. De modo que, dicha crítica se encuentra más enfocada a cuestionar la construcción analítica en torno al sujeto histórico por excelencia del mundo laboral, antes que a negar la virtualidad de la relevancia y la determinación –sin comillas o las siempre sugerentes *cursivas*– de las condiciones materiales, con las que historiar al movimiento obrero. Ahora bien, Ignacio Olábarri, al parecer, no dejaría lo suficientemente claro su rechazo al marxismo. Todo ello, según, el propio Miguel Ángel Cabrera: «This critical reaction has even led some historians to declare that the working-class movements is not a relevant object of study, since it is not an effect or expression of the existence of the working classes but an artificial phenomenon unconnected to them, derived from the external influence of ideologies such as Marxism. For the historians, the only worthwhile history is the history of labor relations». CABRERA, Miguel Ángel, “Developments in Contemporary..., *op.cit.*, p. 1023.

¹³ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*

¹⁴ Remitimos, primero, al balance realizado en su momento por, IGGERS, Georg G., *La ciencia histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales*, Barcelona, Labor, 1995. Otros trabajos clásicos preocupados por ciertas derivas, entre otras muchas posibles referencias, en, FONTANA, Josep, *La historia después del fin de la historia: reflexiones acerca de la situación actual de la ciencia histórica*,

esbozar los dos *paradigmas* hoy vigentes, junto con un invitado “correoso” con claras limitaciones teóricas y metodológicas impropias de una ciencia histórica que se reclame como tal¹⁵: historia obrera clásica y/o tradicional¹⁶, historia obrera sociocultural¹⁷ y historia de lo

Barcelona, Crítica, 1992; id., *La historia de los hombres...*, *op.cit.*; y, concretamente, MARÍN GELABERT, Miquel, “La historia de la historiografía en España: recepción y crisis de una disciplina, 1976-2007” en ORTEGA LÓPEZ, M^a Teresa (coord.), *Por una historia global: el debate historiográfico en los últimos tiempos*, Granada, Universidad de Granada / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 319-437. Y asimismo, CARRERAS, Juan José, *Razón de historia: estudios de historiografía*, Marcial Pons, 2000; e id., *Seis lecciones sobre la historia*, Zaragoza, Instituto «Fernando el Católico», 2003, y dentro de dicho volumen, “El Ángel de la historia” (pp. 83-97).

¹⁵ Una caracterización y graduación que es deudora, en buena medida, del planteamiento de, PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*.

¹⁶ Junto con la bibliografía tanto citada en la *Presentación* como en este capítulo en las *nota 3* y *nota 7*, la referencia actualizada de los *defensores* de la historia social (clásica) se puede localizar en los dos números monográficos incluidos en la revista *Historia Social*, n^o 60, (2008). Con el objetivo de llevar a cabo un diagnóstico en torno a la *salud* de la que goza la historia social clásica (o no) se plantearía dicho número. De esta forma, y en conmemoración del 20^a Aniversario de la citada revista de historia, se reunieron allí lo que a, buen seguro, constituyan las aportaciones más interesantes que sobre el asunto se han recopilado en mucho tiempo. Divido en dos partes (1^a *Formas de hacer historia*; 2^a *¿Qué entendemos hoy por historia social?*) tres rasgos comunes sobresalen de la mayor parte de los artículos publicados. 1. La mutación de la historia social desde su concepción original hasta verse vaciada de contenido y, por lo tanto, convertirse en un concepto genérico, o, un lugar común de la disciplina, si se prefiere; 2. La constatación –que no por dejar de repetirse incesantemente pierde su trascendencia– de la ‘crisis’ por la que atraviesa la historia social, en tanto por el camino de las sucesivas renovaciones ha terminado por perder su significado original; 3. La necesidad cada vez más acuciante de recuperar, retomar y reconstruir aquellos elementos que le eran propios. Un diagnóstico en el que aparecen claramente delimitados los responsables de la actual situación: por un lado, los efectos demoledores del posmodernismo (*disfrazado* en no pocas ocasiones como la ‘nueva historia social’) que ha terminado por incrustarse en no pocos sectores de la historiografía; y por otro lado, se *achaca* a los excesos cometidos a raíz del ‘giro cultural’ ciertas dosis de responsabilidad en la citada *crisis*. Con sus matices cada participante termina por constatar los serios peligros de continuar por esta senda. En este sentido son reveladores los textos de, JOYCE, Patrick, “Lo social en la historia social” (pp. 155-168); LINDEN, Marcel van der, “Acumulación y fragmentación” (pp. 163-170); NÚÑEZ SEIRAS, Xosé Manuel, “La historia social entre el dominio de la historia cultural: algunas reflexiones” (pp. 177-184); PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, “Expansión y retos de la historia social” (pp. 201-206); SANGSTER, Joan, “Historia Social” (pp. 213-224); o VINCENT, Bernard, “Tiempo de reaccionar” (pp. 249-252), entre otros.

¹⁷ Además de los trabajos ya citados de Manuel Pérez Ledesma –principalmente, “Historia del movimiento...”, *op.cit.*; “Nuevas perspectivas en...”, *op.cit.*; y lógicamente el texto con José Álvarez Junco, “Historia del movimiento...”, *op.cit.*– referencias básicas sobre la historia cultural desde finales de los ochenta en, HUNT, Lynn (ed.), *The New Cultural History: essays*, Berkeley / Los Ángeles, University of California Press, 1989; BONELL, Victoria E. y HUNT, Lynn, *Beyond the cultural turn: new directions in the study of society and culture*, Berkeley / Los Ángeles, University of California Press, 1999. Una completa revisión al respecto en: ARCO BLANCO, Miguel Ángel del, “Un paso más allá de la historia cultural: los *cultural studies*” en ORTEGA LÓPEZ, M^a Teresa (coord.), *Por una historia...*, *op.cit.*, pp. 259-289. También téngase aquí presente el estado de la cuestión un tanto exultante presentado en su momento por, HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, “La historia cultural en España: tendencias y contextos de la última década” en COLL i AMARGOS, Joaquim y LLORENS i VILA, Jordi (coords.), *Història i catalanisme. Balanç historiogràfic*. Dossier monogràfic, *Cercles. Revista d'Història Cultural*, n^o 4, (2001), pp. 57-91. Y, por último, véase una voluminosa actualización e, POIRRIER, Philippe (ed.), *La historia cultural. ¿Un giro historiográfico mundial?* Valencia, Publicacions Universitat de Valencia, 2012.

social¹⁸ o post-social –o ya siguiendo la última de las últimas tendencias *postobjetivista*, tan lejos de aquella primigenia *historia discursiva*–¹⁹.

Vista como tal, esta sucesión podría llevar a más de un engaño. Primero, porque ha querido ser presentada como una graduación lineal-histórica de la historiografía social del movimiento obrero. A saber, la historiografía vendría a estar regida por unas *supuestas* fases

¹⁸ Además de las obras de Miguel Ángel Cabrera que se han citado y se citarán, entre las primeras aproximaciones en esta línea destacan los planteos realizados por, ZEMON DAVIES, Natalie, “Las formas de la historia social”, *Historia Social*, n° 10, (1991), pp. 177-182; y JONES, Gareth S., “The determinist fix: some obstacles to the further development of the linguistic approach to history in the 1990s”, *History Workshop Journal*, n° 42, (1996), pp. 19-35. Igualmente véanse para el caso de España buena parte de los trabajos contenidos en el libro coordinado por, ORTEGA LÓPEZ, M^a Teresa (coord.), *Por una historia..., op.cit.*. No pocos capítulos allí contenidos, vayan con el *neo* o con el *post* correspondiente, suponen un acercamiento a esta ‘nueva historia de lo social’. Con un rasgo común: la apuesta por superar los *estrechos moldes* de la historia social clásica más materialista, a modo de consigna: id., “Sobre historia y posmodernidad. La historiografía en los últimos tiempos” (pp. 13-40); MARTYKÁNOVÁ, Darina, “Las personas de su tiempo o la historia de las mentalidades” (pp. 167-189); COSTA, Francisco, “La nueva historia intelectual en el escenario posmoderno: principales formas y presupuestos heurísticos” (pp. 291-318). En esta línea consúltese también el trabajo de, FERRAZ LORENZO, Manuel, “La historia postmoderna (o postsocial) y sus influencias en la historiografía de la educación” en id. (coord.), *Repensar la historia de la educación: Nuevos desafíos, nuevas propuestas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 167-190. En todo caso, este *naciente* paradigma hasta el momento se ha limitado al terreno teórico como tiempo tendremos de examinar. No obstante, y prácticamente siempre fuera de la historiografía nacional, han sido publicadas una serie limitada de monografías que pueden ser incluidas dentro de esta línea: SEWELL, William H., *Trabajo y revolución en Francia. El lenguaje del movimiento obrero, desde el Antiguo Régimen hasta 1848*, Madrid, Taurus, 1992 [*Work and Revolution in France. The Language of Labor from the Old Regime to 1948*, New York, Cambridge University Press, 1980]. De este mismo autor véase su crítica a las tesis de E. P. Thompson por estar demasiadas apegadas a las ‘estructuras’ en, id., “Cómo se forman las clases: reflexiones críticas en torno a la teoría de E. P. Thompson sobre la formación de la clase obrera”, *Historia Social*, n° 18, (1994), pp. 77-100. Trabajo que originalmente estaba incluido en un volumen frontalmente crítico con la obra de Thompson, y que puede localizarse en, KAYE, Harvey J. y McLLELAND, Keith (eds.), *E. P. Thompson. Critical Perspectives*, London, Polity Press, 1990. Igualmente, id., *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*, Chicago, University of Chicago Press, 2005. Ahora bien, han sido las obras sobre el feminismo de Joan W. Scott el principal referente de la historia post-social: SCOTT, Joan W., *Gender and the Politics of History*, New York, Columbia University Press, 1988; o id., *Only Paradoxes to Offer. French Feminist and the Rights of Man*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1996; y id., *Parité! Sexual equality and the crisis of French universalism*, Chicago, University of Chicago Press, 2005. Del interés de su obra da buena cuenta, BORDERÍAS, Cristina (coord.), *Joan Scott y las políticas de la historia*, Barcelona, Icaria, 2006. Dentro de este volumen consúltese, BURGUERA, Mónica, “La influencia de Joan Scott en la historia contemporánea de España: historia social, género y «giro lingüístico»” (pp. 179-211). Por último, compléntese dichas referencias con la bibliografía apuntada en la *nota 5* y *nota 33*.

¹⁹ El historiador Miguel Ángel Cabrera ha sido el máximo difusor e impulsor del ‘nuevo paradigma’ de la historia post-social. Numerosos han sido sus acercamientos. Junto las aportaciones ya referenciadas, CABRERA, Miguel Ángel, *Historia, lenguaje y teoría de la sociedad*, Madrid, Cátedra, 2001 [*Postsocial History. An Introduction*, Oxford, Lexington Books, 2004]; id., “La crisis de la historia social y el surgimiento de una historia postsocial”, *Historia Social*, n° 51, (2003), pp. 201-224; id. y SANTANA ACUÑA, Álvaro, “De la historia social a la historia de lo social” en id. (ed.), *Más allá de la historia social. Dossier monográfico Ayer*, n° 62, (2006), pp. 165-192; id., “La historia y los historiadores tras la crisis de la modernidad” en SÁNCHEZ LEÓN, Pablo y IZQUIERDO MARTÍN, Jesús (coords.), *El fin de los historiadores: pensar históricamente en el siglo XXI*, Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 41-60. En todo caso, en este trabajo se seguirán las principales reflexiones desarrolladas en su día por este mismo autor en, id., “Historia y teoría de la sociedad: del giro culturalista al giro lingüístico” en FORCADELL, Carlos y PEIRÓ, Ignacio (coords.), *Lecturas de la Historia. Nueve reflexiones sobre Historia de la Historiografía*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2001, pp. 255-272; y de forma específica, id., DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España..., op.cit.*

que se concretarían de la siguiente manera: crisis de un paradigma-nacimiento de nuevas propuestas-consolidación del nuevo paradigma-proceso de desaparición de los viejos paradigmas. Una evolución determinista de tal tipo implica subjetivamente un *progreso* en la disciplina. Lo que no es cierto si por *progreso* entendemos que dichos *paradigmas* puedan aportar más y mejores herramientas para la *interpretación* de lo histórico.

Si las críticas desde la historia social clásica hacia la historia sociocultural ya habían puesto sobre el tapete los riesgos que conllevaba cualquier posible alejamiento de las bases materiales de la historia del momento obrero, aunque reconocía su necesidad, en un primer momento, para superar ciertos *determinismos*; las nuevas propuestas de la historia de lo social o post-social, transcurren por la frontera de lo que puede ser considerado o no propiamente una aportación al conocimiento histórico. En breve nos detendremos en sus principales objetivos y enfoques, aunque antes toca interrogarse cómo y por qué vías hemos llegado hasta aquí.

Lo anterior es consecuencia de la instalación –en buena parte de la “academia”– del recurrente *todo es válido*. Un relativismo que aunque no puede asociarse *alegremente* al impacto del *posmodernismo*, si tiene sus conexiones profundas. A falta de debates y reflexiones mayores, se comienza a transitar por caminos que no hace mucho tiempo hubieran sido impensables. Por muy *modernos* que éstos sean. De ahí los riesgos más que previsibles de continuar esta “evolución” y “progreso”.

De entrada tenemos una no desdeñable constatación: “[E]l papel que ha ido perdiendo el historiador en el contexto social y académico como eje de interpretación del pasado para conocer en mundo en que ahora vive”²⁰. De hecho, podría darse el caso en un corto-mediano periodo de que sin ser *conscientes* nos encontráramos con la expulsión de los sujetos históricos, de sus organizaciones, formas de vida, y otras categorías histórica tan clásicas, fuera de los dominios de Clío²¹.

3.1. Un pequeño-gran debate por explorar: *ortodoxos* y *heterodoxos* en busca del sentido de lo social

Detengámonos, primero, en las cuestiones teóricas. Un terreno poco propicio para “consensos”. En esta ocasión, vamos a modificar el tradicional ángulo de observación que se suele adoptar en este tipo de análisis de la historiografía de la historia social. Así pues, partiremos de las aportaciones de la historia post-social, para detenernos en la historia socio-cultural –también llamada en su momento, “historia cultural de la sociedad” – y finalmente en la historia social (*clásica* o no). Y lo haremos apoyándonos en tres textos, que tienen de común el haberse publicado en fechas similares. *Aportaciones* que, a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, siguen conservando, en nuestra opinión, una plena actualidad. Nos referimos en concreto al texto firmado por Miguel Ángel Cabrera, Blanca Divassón y Jesús de Felipe, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?”²²; al de Manuel Pérez Ledesma,

²⁰ PANIAGUA, Javier, “La historia social en el diván del psicoanalista” en *¿Qué entendemos hoy por historia social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), p. 197. Y concluía el autor a continuación: «Su consumo y producción se abaste de los de su misma cuerda y no tengo claro que aporta a la situación en que vivimos: ‘Es la crisis de la historia, estúpido’, que diría el economista». *Ibidem*. Del mismo autor, id. y PIQUERAS, José Antonio, *Los usos de la historia*, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente, 2000.

²¹ El trabajo de MORADIELLOS, Enrique, *Las caras de Clío: una introducción a la historia*, Madrid, Siglo XXI, 2001, debería tenerse presente en estos tiempos de *zozobras* historiográficas.

²² CABRERA, Miguel Ángel, DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España...*, *op.cit.*.

“Nuevas perspectivas de Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)”²³; y, finalmente, al de José Antonio Piqueras, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores”²⁴. Ciertamente, se habrían podido buscar otras referencias, pero somos de la opinión de que las aquí seleccionadas nos ayudan a introducirnos de forma correcta y concreta en lo que estamos tratando.

La posible *utilidad* de presentar el citado debate de cara a nuestra investigación reside en lo siguiente: el objetivo último de la presente investigación reside en contestar a la siguiente pregunta: ¿los “porqués” y “los cómo” de la *formación histórica de la generación de la cultura de la precariedad* en la década de los años ochenta? A partir de lo avanzado en parte, entonces ¿cuáles de los siguientes *enfoques teóricos* que se expondrán podrían proporcionarnos no sólo mejores herramientas de análisis, sino ante todo respuestas historiográficas coherentes y válidas a nuestro interrogante central? Una pregunta, creemos, que se responde, en lo básico, con las siguientes indagaciones sobre dichas cuestiones teóricas, aunque más adelante se volverá con detenimiento en torno tal objeto en sucesivos Epígrafes.

Así pues, en relación a la primera de las posiciones destacadas, ha sido Miguel Ángel Cabrera, profesor de la Universidad de La Laguna, su mayor promotor y defensor. Autor prolífico, quien, paso a paso, iría limando y perfeccionando sus hipótesis de trabajo, con cada vez, eso sí, menores novedades que presentar. En cualquier caso, sería en el año 2008 junto con Blanca Divassón y Jesús de Felipe, cuando, por fin, trataría de dar el pequeño-gran *salto adelante* y propugnar la “tercera ruptura” dentro de la historiografía dedicada al movimiento obrero. Una propuesta de *ruptura* que no marcaría ningún punto de inflexión dentro del campo del conocimiento histórico. Así su solo enunciando atraería más de una mirada pero sobre todo un conjunto de críticas.

Con un título, prácticamente, igual al que emplearan en 1982 José Álvarez Junco y Manuel Pérez Ledesma –“Historia del movimiento obrero: ¿una segunda ruptura?”²⁵– Cabrera y sus dos discípulos presentarían, en primer lugar, el *envoltorio* de su propuesta de *tercera ruptura*, con todos los alicientes de novedad posibles, por más que a la hora de la elección del título se hubiera optado cierta *comodidad*. Para tal presentación recurrían a dos de los tópicos más comunes que se suelen citar cada vez que se habla de historia, historiadores e historiografía del movimiento obrero: retraso y falta de modernización/europeización²⁶. Un envoltorio previo, tan típico del *comercio de la historia* del que hablara Pierre Vilar²⁷.

²³ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*

²⁴ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer..., op.cit.*

²⁵ ALVAREZ JUNCO, José y PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Historia del movimiento..., op.cit.

²⁶ «[C]ontinúa existiendo un claro retraso con respecto a la situación que en este campo de estudio se ha alcanzado en otros países. Se podría decir que, en lo esencial, la historia española del movimiento obrero se encuentra actualmente a la altura en que se encontraban las historiografías más avanzadas en la década de 1980, pero apenas ha tomado en consideración e incorporado a sus investigaciones las innovaciones teóricas y los debates que se han producido durante los últimos años». CABRERA, Miguel Ángel, DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España..., op.cit.*, p. 46. Un *lamento* que se repite sin cesar como señaló con otro *ánimo* hace dos décadas Carlos Forcadell: «Una primera constatación es la de que en la comunidad historiográfica nacional española resulta más frecuente, y más viable, reflexionar sobre la evolución y la articulación de la historia social en general, de sus diversas prácticas y concepciones, desde sus orígenes hasta su pretendida crisis, o sus problemas de presente y de futuro, a partir de las tradiciones europeas y norteamericanas, de la británica, francesa y alemana de modo muy particular, que hacerlo dentro del marco de la propia historiografía. La historia de los movimientos sociales en España, o la historia social de la que forma parte y con la que resulta difícil

«Así pues, de nuevo hoy, como una veinte años atrás, parece que la historia española del movimiento obrero necesita realizar un nuevo esfuerzo de renovación si se quiere poner a la altura de los últimos avances que se han producido en este campo en el ámbito internacional».

A partir de aquí, se “[n]ecesita realizar una nueva *ruptura*”²⁸.

Tras el crítico repaso de la historiografía del movimiento obrero –en donde, al parecer, tras tantos años hablando de adelantos (parciales o totales), estos no escondían más que las insuficiencias propias del gremio poco propenso a reconocer sus *desventuras*– fijaban la atención en los escasos resultados que la perspectiva socio-cultural había venido a ofrecer. La historia social clásica –con el *terrible* adjetivo de “materialista”– constituía un caso aparte. Sin remedio, en otras palabras. De esta forma, se mirara por donde se mirara aquello era un fracaso. Así los autores observaban la terquedad de los historiadores socioculturales por su obsesión en su “descenso hacia la clase”²⁹.

«Aunque, por supuesto, por mucho que los nuevos historiadores culturales atribuyeran a la cultura y a la práctica de los sujetos un papel activo en la formación de la clase, nunca pondrán en duda el supuesto previo de que la identidad de clase tiene su fundamento causal último en la clase y de que, por tanto, ésta ha de ser considerada como una entidad de naturaleza objetiva»³⁰.

En verdad, el panorama no podía ser más desolador cuando se revisaba lo publicado durante las últimas décadas. Por lo demás, como buenos publicistas de “su” causa, y constatado como tales visiones han “ido perdiendo gran parte de su plausibilidad teórica y de su eficacia explicativa”³¹; había llegado la hora de presentar las virtudes del “nuevo producto”. Un *nuevo producto* relativo, en tanto aquella “tercera ruptura” era la suma –realizadas las matizaciones oportunas así como los ajustes pertinentes– de no pocas publicaciones previas, en donde se llegaría a hablar –en términos, ciertamente, grandilocuentes– de una “teoría de la sociedad de la nueva historia”, que conllevaba, ni más ni menos, que un “nuevo concepto de sujeto, diferente tanto del sujeto racional de la historia idealista como del sujeto social de la historia materialista”³².

Nos detendremos aquí en tres de las cuestiones centrales que se abordan, y que más relación tienen con la presente investigación: la nueva concepción de lo que, en su opinión, ha de interpretarse como la “identidad de clase”; y a partir de ahí, el papel del “lenguaje” así como

establecer las fronteras, no tendría orígenes, ni crisis, ni hitos de importancia, ni sabríamos sistematizar su desarrollo temático o cronológico». FORCADELL, Carlos, “Sobre desiertos y..., *op.cit.*, p. 101.

²⁷ VILAR, Pierre, *Historia marxista, historia...*, *op.cit.*.

²⁸ CABRERA, Miguel Ángel, DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España...*, *op.cit.*, p. 46 [*cursiva* en el texto original].

²⁹ Expresión que toma *prestada e instrumentaliza* a continuación, a partir de la afirmación de Josep Termes en la introducción de un conocido libro, en donde afirmaba que era necesario «bajar del grupúsculo a la clase obrera». TERMES, Josep, “Prólogo” en BONAMUSA, Francesc, *Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937)*, Barcelona, Anagrama, 1977, p. III. Citado en, CABRERA, Miguel Ángel, DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España...*, *op.cit.*, p. 48, *nota* 2. Una visión radicalmente diferente es la lectura de, GABRIEL, Pere, “A vueltas y..., *op.cit.*, p. 44, *nota* 6, quien citaría el texto de forma menos *abusiva*.

³⁰ *Ibídem*, p. 48.

³¹ *Ibídem*, p. 64.

³² CABRERA, Miguel Ángel, “Historia y teoría de la sociedad: del giro culturalista al giro lingüístico” en FORCADELL, Carlos y PEIRÓ, Ignacio (coords.), *Lecturas de la...*, *op.cit.*, p. 267. Aconsejable, aquí, se hace releer el trabajo de, BARROS, Carlos, “El retorno del sujeto social en la Historiografía española” en CASTILLO, Santiago y ORTIZ DE ORRUÑO, José M^a (coords.), *Estado, protesta y movimientos sociales: actas del III Congreso de Historia Social de España, Vitoria-Gasteiz, julio de 1997 [3º, 1997, Vitoria]*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 191-214.

del “imaginario social común”, junto con el falso presupuesto de que se pueda hablar de la existencia objetiva de una “realidad material” en la formación histórica del movimiento obrero. Antes de adentrarse en las mismas, ha de destacarse como a cada propuesta –o simple *idea* que se *vierte*– se la acompaña de una coletilla hartamente interesante: según “está poniendo de manifiesto la investigación histórica”, que conjugada en diversas formas, en rara ocasión, iría acompañada no sólo de las referencias bibliográficas de turno, sino de datos y ejemplos coherentes y consistentes–y resistentes, dicho sea de paso, a la propia coherencia que se le suele atribuir al historiador “común” por regla general³³. Otro tanto sucede con el abuso del adjetivo *nuevo* o del prefijo *post*³⁴.

Con respecto a la primera cuestión, se hace más que patente los porqués del (auto)empleo del adjetivo “post-objetivistas”. Tras hablar de una “reacción crítica” –sin dato ni fuente contrastable, de nuevo³⁵– que supuestamente ha “ido tomando cuerpo” y que habría dado lugar a “una nueva perspectiva teórica y una explicación diferente del origen y formación del movimiento y de la identidad obreras”, se *lanza* el primer axioma:

«Desde esta nueva perspectiva, las identidades obreras y la acción colectiva no tienen su origen en la existencia de la clase obrera ni son una mera respuesta a las condiciones materiales de vida y de trabajo, como si esa existencia y esas condiciones constituyeran fenómenos objetivos»³⁶.

³³ Las referencias principales que se manejan todo el tiempo se reducen a un limitado conjunto de historiadores –Charles Taylor, Patrick Joyce, Mary Poovey o Joan Scott– en su mayoría anglosajones. Entre otras: JOYCE, Patrick, “Refabricating Labour History: or, from Labour History to the History of Labour”, *Labour History Review*, vol. LXII, nº 2, (1997), pp. 147-152; SCOTT, Joan, “Women in *The Making of the English Working Class*” en *Gender and the Politics of History*, New York, Columbia University Press, 1999 [1988], pp. 68-90; TAYLOR, Charles, *Modern Social Imaginaries*, Durham, Duke University Press, 2004; POOVEY, Mary, “The social constitution of «class»: toward a history of classificatory thinking” en DIMOCK, Wai-chee y GILMORE, Michael T. (eds.), *Rethinking class: literary studies and social formations*, New York, Columbia University Press, 1994, pp. 14-56. En castellano, prácticamente, se limita a citar a, DÍEZ, Fernando, *Utilidad, deseo y virtud. La formación de la idea moderna de trabajo*, Barcelona, Península, 2001. Este mismo autor señalaría en otro trabajo posterior: «La proletarianización es un lenguaje particularmente fuerte sobre la situación negativa de la clase obrera en los medios del capitalismo concurrencial y la primera industrialización. Lenguaje de recio tono asertivo que contrasta con otras formalizaciones de la condición de los trabajadores asalariados, menos radicales [...] que se formulan en la misma época. El lector debe ser advertido de que en los años 30 y 40 del siglo XIX se despliega una amplia panoplia de lenguajes del trabajo de los que forma parte el que ahora nos interesa». Id., “La literatura de la «condición obrera» y el lenguaje de la proletarianización” en SANZ, Vicent y PIQUERAS, José Antonio (eds.), *En el nombre del oficio. El trabajador especializado: corporativismo, adaptación y protesta*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, p. 72.

³⁴ «Por más que el calificativo *post* se enarbore como la superación de la historiografía existente, con frecuencia tal afán no va acompañado de trabajos empíricos que avalen la nueva propuesta. Mientras que Tuñón de Lara siempre avaló sus reflexiones con trabajos de notable calidad empírica y con significativos avances en el conocimiento del pasado, no se puede decir lo mismo de quienes se postulan adalides de la *historia postsocial*, que no hacen realidad, sino sólo verbo». PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, “Cuestiones de Historia Social en la estela de Tuñón de Lara” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*, p. 37.

³⁵ El empeño persiste en, CABRERA, Miguel Ángel, “Presente histórico y cambio historiográfico. El presente como laboratorio de la investigación histórica” en CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo, FANDIÑO PÉREZ, Roberto y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Historia social, movimientos sociales y ciudadanía*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, pp. 23-34. Véase también aquí: id., “El eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad” en id. (ed.), *Más allá de..., op.cit.*, pp. 111-138.

³⁶ Id., DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España..., op.cit.*, p. 65. A continuación señala: «Y ello porque la manera como los actores históricos conciben su existencia material, los significados que atribuyen esta y su reacción frente a la misma, así como la forma

No sólo es que las visiones materialistas hayan errado plenamente en su análisis –todo un *tópico* dentro de esta visión, caracterizada, en parte, por su *obsesión anti-materialista*–³⁷ sino que, además, la “denominada historia postsocial (o postobjetivista) del movimiento obrero sostiene [...] que las categorías mediante las cuales las personas realizan esa articulación significativa con la realidad social no son una mera interiorización cultural de dicha realidad”³⁸. A saber, “tienen una naturaleza diferente”. Una *naturaleza* no apta para los no iniciados en el universo del *discurso* y del *imaginario*.

La respuesta que se esboza a lo anterior, conlleva la configuración como supra-categoría del citado *imaginario*. A partir de esta categoría de *tintes estructuralistas*, a la hora de adentrarse en la formación de la identidad de clase de los *trabajadores* –o como quiera que se les denomine dentro de esta sucesión anómala de conceptualizaciones, en ocasiones gratuitas y en otras banales– las condiciones objetivas y subjetivas en que se realiza un trabajo por salario, o sus propias necesidades vitales como *Homo Sapiens Sapiens*, devendría en poco o nada relevantes.

«En el caso del movimiento obrero, es dicho imaginario el que proporcionará a los trabajadores, a partir del siglo XIX, el arsenal conceptual mediante el cual aprehendieron significativamente sus condiciones de existencia, forjaron su programa de reivindicaciones, diseñaron sus estrategias de resistencia y de acciones y definieron sus expectativas y los objetivos de sus luchas»³⁹.

A saber, el *imaginario* como concepto, como muy supuesta entidad epistemológica, devendría en un factor explicativo de primer orden, por encima de la propia realidad material. Siendo esto así, en tanto la “nueva ruptura teórica [...] nos obliga a dejar de considerar la identidad de clase como la forma de identidad natural de los obreros”⁴⁰, es hora de desterrar a los historiadores clásicos, sin olvidarse de sus necesarios “colaboradores”, a saber, los historiadores socioculturales, para dedicarse a las *nuevas labores*.

La segunda gran aportación de la “tercera ruptura” de estos mismos autores –por más que ya fuera previamente presentada en no pocas ocasiones, a través de lo que se definiera como un “nuevo concepto de lenguaje”⁴¹– consiste en complementar la supra-categoría del *imaginario* con la del *lenguaje*, con el fin de afianzar las bases analíticas del *nuevo producto* en venta. Si el propio Cabrera ya había hablado en su momento de la relevancia de examinar lo que calificaba como la “mediación lingüística”⁴², en este mismo texto ya se iba a definir a las propias

en que definen su identidad, no están determinados por su situación social, sino que dependen de la visión del mundo y de la consiguiente matriz categorial mediante las cuales esos actores perciben y confieren sentido a dicha situación». *Ibíd.*

³⁷ Previamente, el autor se felicitaría por los resultados del *giro cultural*, que aunque minoritario en su opinión, habían conllevado una pequeña gran victoria: «a critical reformulation of the materialist explanatory model of traditional social history». CABRERA, Miguel Ángel, “Developments in Contemporary...”, *op.cit.*, p. 1016.

³⁸ *Id.*, DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España...*, *op.cit.*, p. 65.

³⁹ *Ibíd.*, p. 66. A modo de teórica constatación se decía: «Y así, por ejemplo, si los obreros pudieron experimentar su situación de explotación o de opresión o llegar a verse en sí mismos como sujetos revolucionarios es porque estaban imbuidos de nociones modernas como la igualdad o emancipación de la humedad». *Ibíd.*

⁴⁰ *Ibíd.*, p. 71.

⁴¹ Véase aquí, *id.*, “La nueva historia: realidad, discurso, diferencia” en *Historia, lenguaje y...*, *op.cit.*, pp. 21-ss.

⁴² *Id.*, “Historia y teoría de la sociedad: del giro culturalista al giro lingüístico” en FORCADELL, Carlos y PEIRÓ, Ignacio (coords.), *Lecturas de la...*, *op.cit.*, p. 267.

“categorías lingüísticas” como un “recurso imprescindible”⁴³. Afirmándose, por lo demás, lo siguiente:

«[E]l lenguaje es el medio en que esa identidad se constituye, en el sentido de que si esta pudo surgir fue porque previamente existían las correspondientes categorías de identidad. Según los historiadores postsociales del movimiento obrero, las categorías de identidad preexisten a las identidades y son las que confieren ciertos atributos sociales o físicos, de las personas su condición de referente identitario»⁴⁴.

Presentada la aportación teórica no se tendría el menor reparo en llevar a cabo su traslación (teóricamente) empírica:

«Si los obreros pudieron llegar a identificarse, sentirse y actuar colectivamente como pueblo soberano, como ciudadanos productores poseedores de derechos naturales o como clase es porque las categorías de *pueblo*, de *ciudadanía* y de *clase* estaban disponibles para ellos, como componentes del sistema clasificatorio de los seres humanos introducidos por el imaginario moderno»⁴⁵.

Bajo estas sólidas bases teóricas a la par que metodológicas se asentará la que, sin duda, ha de ser considerada como la tercera gran aportación de este conjunto de historiadores. Y que bien podría definirse –por más que la lógica y el razonamiento humano se vean seriamente constreñidos– en que no existe “realidad objetiva” que se pueda llegar a historiar en sí misma. O

⁴³ Id., DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España...*, *op.cit.*, p. 67.

⁴⁴ *Ibidem*. Un tiempo atrás afirmaré el propio Cabrera que las mencionadas *categorías heredadas* son, a la postre, la única ‘entidad objetiva’: «¿Pero en qué se basa la nueva historia para llegar a esta conclusión y formular el consiguiente postulado teórico? Se basa en que, según muestra la investigación histórica, todo nuevo fenómeno social es siempre aprehendido significativamente por los individuos mediante un cuerpo de conceptos que existe con anterioridad. De lo que se sigue que la realidad no genera sus propios significados o marco interpretativo heredado del pasado. Pero no es sólo eso. Es que, además, en esa interacción entre realidad social y matriz categorial previa, es esta segunda, y no la primera, la que desempeña la función activa, es decir, la que establece las condiciones de posibilidad de los significados que los individuos otorgan a la realidad. En dicha interacción, la matriz categorial heredada impone unas reglas de significación a las que la nueva situación social ha de someterse y a través de las cuales ha de acceder, necesariamente, a la conciencia. Desde este punto de vista, las categorías heredadas no son simplemente el medio a través del cual unos significados que son sociales emergen a la conciencia; dichas categorías no son meramente la forma verbal o el ropaje cultural que los significados objetivos adoptan, como sostenía la historia sociocultural. Por el contrario, son las categorías heredadas las que confieren su significado a la realidad social y las que, de este modo, la convierten en una entidad objetiva». CABRERA, Miguel Ángel, “Historia y teoría de la sociedad: del giro culturalista al giro lingüístico” en FORCADELL, Carlos y PEIRÓ, Ignacio (coords.), *Lecturas de la...*, *op.cit.*, p. 262.

⁴⁵ Id., DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en id., BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España...*, *op.cit.*, p. 67. La gran diferencia –sin comillas ni cursivas– entre las *tesis* de Cabrera y de Pérez Ledesma residirían justo aquí. Mientras que para el primero el lenguaje es una mera cuestión *a priori* para el segundo no es así en absoluto: «Para que las elaboraciones lingüísticas y las imágenes mencionadas se convirtieran en ‘estructuras cognoscitivas’ compartidas [...] era necesario un largo proceso de formulación y difusión de esas tramas de significado; pero también resultaba imprescindible superar algunos obstáculos procedentes de las visiones anteriores». PÉREZ LEDESMA, Manuel, “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en CRUZ, Rafael y id. (eds.), *Cultura y movilización en la España contemporánea*, Madrid, Alianza, 1998, p. 208. Véase también lo apuntado en la *nota* 67. Por lo demás, resulta interesante examinar, bajo esta misma óptica, la traslación de la teoría a la práctica por parte de Manuel Pérez Ledesma al respecto del concepto de ciudadanía. Trabajos que, en suma, evidencia las no poca dificultades de efectuar tal *operación*: id., “El lenguaje de la ciudadanía en la España contemporánea” en id. (dir.), *De súbditos a...*, *op.cit.*, pp. 201-233; y más recientemente, id., “La ciudadanía, del siglo XX al siglo XXI” en CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo, FANDIÑO PÉREZ, Roberto y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Historia social, movimientos...*, *op.cit.*, pp. 195-211.

dicho de otra forma, los obreros no se identificarían entre sí por sus condiciones materiales, por no hablar de estrafalarias cuestiones de la *clase en sí* y *clase para sí*. No. Se identificarían entre sí por compartir una “articulación significativa” de imaginarios y lenguajes⁴⁶. Pero vayamos, una vez más, a las “fuentes originales” para evitar cualquier tipo de mala interpretación:

«Lo que se afirma es que la realidad material que interviene en la configuración del movimiento obrero no es una realidad objetiva, en el sentido ya indicado de que posea significados intrínsecos y de que tenga la capacidad de proyectarlos, por sí misma, en formas de identidad y en acciones. Lo que se afirma, en suma, es que la conexión entre el movimiento obrero y su base social no es una conexión causal, sino de articulación significativa»⁴⁷.

Por sí cabía algún matiz o duda tampoco se tendría reparo en decir como lo “que los obreros hacen no es experimentar el mundo, sino convertirlo en una entidad significativa”. Afirmado esto, toca abandonar “toda visión esencialista y teológica de la clase obrera y toda interpretación objetivista del movimiento obrera basada en la noción de estructura social”⁴⁸. Toda una invitación a disolver la interpretación de lo histórico de cualquier base material. Lo anterior, lógicamente, implica que las tradicionales categorías de “trabajo”⁴⁹ y “trabajadores”⁵⁰ se lleguen a ver profundamente alteradas.

Claro está, que a fuerza de proponer y volver a *soltar* ideas antes que hipótesis o herramientas analíticas, algunas de las mismas pueden llegar a resultar interesantes a primera vista. Por ejemplo, que la “identidad de clase ha sido un fenómeno histórico más bien excepcional”⁵¹; o, que, la “identidad laboral de los trabajadores no puede dissociarse de su constitución como sujetos políticos”⁵². Y, sin embargo, lo que puede resultar –a primera vista, insistimos una vez más– como aportaciones relevantes o novedades, no lo son tanto cuando se repasan los debates y las aportaciones que han acompañado y caracterizado a buena parte de la historiografía –obrerista o no, pero sí culturalista– de estos últimos treinta años⁵³.

⁴⁶ También al respecto resulta del todo clarificador examinar como abordaría esta misma cuestión en: CABRERA, Miguel Ángel, “La historia postsocial: más allá del imaginario moderno” en ORTEGA LÓPEZ, M^a Teresa (coord.), *Por una historia...*, op.cit., pp. 41-72.

⁴⁷ Id., DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España...*, op.cit., p. 68.

⁴⁸ *Ibíd.*, p. 69.

⁴⁹ Pertinente es detenerse en la definición que proporciona de *trabajo*: «El trabajo, en tanto que actividad productiva, puede ser articulado de diversas maneras y, por tanto, dar lugar a diferentes definiciones de explotación y a repertorios reivindicativos, conflictos laborales, proyectos alternativos de organización económica y formas de movilización y de acción bastante diferentes». *Ibíd.*, p. 70.

⁵⁰ «De modo que el *trabajador*, sujeto del movimiento obrero, no es tampoco una entidad natural, sino que su definición varía enormemente según la categoría de trabajo y de explotación con que es articulado en cada caso». *Ibíd.*, pp. 70-71.

⁵¹ *Ibíd.*, p. 72. Recuérdense lo que el propio Pérez Ledesma diría al respecto: «No se trata tampoco de una identidad única o predominante en todo tiempo y lugar; de hecho, la identidad de clase ha coexistido a lo largo del tiempo, en una relación difícil y a veces conflictiva, con otras identidades colectivas –basadas en la raza, la nación, la religión, el género o la pertenencia al ‘pueblo’– sin que de antemano se pudiera atribuir la primacía a ninguna de ellas». PÉREZ LEDESMA, Manuel, “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en CRUZ, Rafael y id. (eds.), *Cultura y movilización...*, op.cit., p. 202.

⁵² CABRERA, Miguel Ángel, DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España...*, op.cit., p. 74.

⁵³ Significativo sería la publicación al respecto de, VÁZQUEZ de PRADA, Valentín, OLÁBARRI, Ignacio, CASPISTEGUI, Francisco Javier y BURKE, Peter (eds.), *En la encrucijada de la ciencia histórica hoy: el auge de la historia cultural [VI Conversaciones Internacionales de Historia,*

En resumen, tras dichas aportaciones, y pese a su tono amable y aparentemente no ideológico –seña de identidad tanto de esta propuesta como de la historia sociocultural– lo que nos encontramos es con una visión “fundamentalista” de la interpretación de lo histórico con, probablemente, muy poco recorrido en el campo de la investigación. No sólo, pues, tales propuestas en nada ayudan avanzar ni a reconstruir la propia historia del movimiento obrero sobre unas bases sólidas y materializables.

Nos explicamos. La propuesta de Miguel Ángel Cabrera, junto con Blanca Divassón y Jesús de Felipe, parte del rechazo, desde su inicial formulación, de estudiar el movimiento obrero como sujeto histórico a partir de unas condiciones estructurales en una coyuntura concreta. Eso sería lo de menos, en tanto que la clase obrera hubiera o no sufrido un proceso de proletarianización y depauperización generalizadas, que hubieran o no creado organizaciones *ad hoc*, o hubieran terminado por adquirir una conciencia (*de clase*) o una identidad colectiva, ninguno de estos procesos tienen importancia. Lo único relevante en términos históricos –y que aquí entra una visión determinista, estrecha y con claros síntomas de búsqueda de una “verdad” única – son los procesos de mediación lingüística entre los sujetos y su mundo (no *material*, no *objetivo*). Es decir, un factor –prácticamente el único a tener en cuenta– a *priori* antes de adentrarse por las bases materiales de cualquier proceso histórico. Claro está que, a partir de ahí, carecen de significados las formas monetarias, la teoría de la explotación, las formas de interrelación personales o colectivas...Y puestos, a la labor, incluso la propia concepción thompsonsiana de *experiencia*, que, lejos de *falsas apariencias*, procedía de la “casa común” del materialismo marxista⁵⁴. Del sujeto –que en esta lectura carece de la más mínima importancia en un lectura con claros síntomas *elitistas*– interesa única y exclusivamente sus categorizaciones lingüísticas, pues sería lo único objetivable, lo único real. Lo demás estaría fuera del alcance del historiador. Evidentemente la anterior propuesta busca una clara ruptura no sólo con la historia social clásica sino con la historia entendida como ciencia histórica⁵⁵. Llegados aquí, por tanto, lo sustancial es interrogarse acerca de si estas propuestas pueden y han de ser consideradas en el campo de la historiografía, como una aportación válida y que, al menos, cumpla con las mínimas reglas de juego.

En respuesta tanto al anterior texto como al ya citado de José Antonio Piqueras, Manuel Pérez Ledesma en un artículo dentro de un dossier de homenaje –precisamente– a Manuel Tuñón de Lara, trataría de encontrar el ansiado “centro” del propio debate historiográfico, desde una visión *distante* a la par que *crítica* con las otras dos interpretaciones en juego.

En nuevas perspectivas de Historia Social plantearía, a grandes trazos, tres tesis. En primer término, vendría a cuestionar la idea de lo *nuevo* en el terreno de lo historiográfico y su relación con la idea de *progreso* en la “ciencia histórica”⁵⁶. Planteo que complementaría con lo que denominaría como los “Tres estadios de la historia social”:

Universidad de Navarra, Pamplona, 10-12 de abril, 1997], Pamplona, EUNSA, 1998. Y también justo unos años antes, OLÁBARRI, Ignacio y CASPISTEGUI, Francisco Javier (dirs.), *La “nueva” historia cultural: La influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad*, Madrid, Editorial Complutense, 1996.

⁵⁴ Véanse las *nota 5*, *nota 124* y la *nota 125*. Por lo demás, nos remitimos a, FONTANA, Josep, “La importancia de E. P. Thompson”, *Mientras Tanto*, nº 58, (1994), pp. 81-86.

⁵⁵ Véase lo planteado en su día por, PIQUERAS, José Antonio A. y SANZ, Vicent, “The social History..., *op.cit.*..

⁵⁶ Como ejemplo de lo *efímero*, de lo nuevo, recuerda la traducción del artículo de, ZEMON DAVIS, Natalie, “Las formas de..., *op.cit.*.. Unos años antes de la publicación del anterior artículo, Pérez Ledesma expresaba en un controvertido texto, otra valoración sobre el *progreso* dentro de la academia: «Por consiguiente, y para concluir, me gustaría sólo señalar que, puesto que en estos momentos nos encontramos ante una disciplina estrictamente académica, organizada y estructurada académicamente, que ha perdido su vinculación y sus lectores potenciales, que ha perdido su papel como instrumento para la toma de conciencia, conviene aprovechar algunas de las virtudes que, junto con todos sus defectos, tiene la academia. Entre otras el contacto con otras disciplinas, la depuración de los conceptos, la

«El nuevo relato ha aparecido en dos versiones: una dedicada a la evolución global de la historia social; y otra referida de forma específica a la historia española del movimiento obrero. En ambas, en todo caso, el recorrido se encuentra dividido en las mismas tres fases. En la versión más general, la primera de esas fases, la historia social clásica vinculada al materialismo histórico o a la escuela de *Annales*, se asentaba en una definición de la causalidad social [...]. En cambio, la segunda, la historia sociocultural o ‘nueva historia cultural’, que apareció en los años setenta gracias a la obra de E. P. Thompson, otorgaba una mayor autonomía a la cultura [...], aunque seguía manteniendo la dicotomía entre la estructura y los sujetos y otorgando la primacía casual, aunque añadiera el papel mediador de la experiencia, a la esfera socioeconómica. Por fin, la nueva historia, definida también como ‘historia discursiva’ o, de acuerdo, con la definición que el tiempo ha vuelto familiar, como ‘historia post-social’ pretendía romper el modelo dicotómico e introducir las premisas que ya conocemos, y que pueden resumirse en la autonomía y el papel decisivo del discurso»⁵⁷.

Una gradación de etapas que en su opinión, “representa[ba] un progreso”, en tanto la aparición de la historia sociocultural,

«ayudaba a entender mejor los comportamientos de los sujetos y los grupos, en especial aquellos que no se ajustaban a las predicciones teóricas del esquema anterior: por su parte, la tercera suponía un nuevo avance en la medida en que permitía acabar con el viejo dilema de sociólogos e historiadores entre la sociedad y los individuos»⁵⁸.

Presentadas las etapas del citado “progreso”, se pretendía establecer allí una especie de “alianza” o necesaria “colaboración” entre la *segunda* y *tercera* fase, frente al que, si bien, no era el *enemigo*, si bien, podía considerarse el *adversario* a partir de entonces. Desde una mirada no diremos de *superioridad* pero sí, en parte, *paternalista* acerca de las limitaciones, contradicciones y giros internos en relación a la historia post-social, se revisaban sus aportaciones al siempre inacabado debate (teórico). Como era de prever, el interrogante de Pérez Ledesma se fundamentaba en torno a sí el *teórico* fracaso de la historia sociocultural en el intento de renovación de la disciplina –explicado a partir de sus “ideas heredadas de la historia social clásica”⁵⁹– explicaría, por sí mismo, la irrupción de la historia post-social.

ampliación de los temas. Así es como va progresando la historia». PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Historia del movimiento..., *op.cit.*, 15.

⁵⁷ Id., “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*, pp. 242-243.

⁵⁸ Ibídem, p. 243. Sobre la crisis de lo que se denomina como la *historia social marxista* se apuntaba: «se produjeron las dificultades y los problemas que obligaron al paso de la primera a la segunda fase: sólo desde el planteamiento marxista pudieron verse como anomalías determinados comportamientos sociales que no se ajustaban a las predicciones [...]; y por ello sólo en ese marco fue necesario preguntarse por la ausencia de las reacciones predefinidas en la teoría, e introducir los ingredientes culturales como factor explicativo». Ibídem, pp. 243-244.

⁵⁹ Ibídem, p. 245. A buen seguro las críticas –*directas* o *indirectas*– sobre Pérez Ledesma sean injustas en este sentido. Recordemos como definía este último a la historia socio-cultural en una de las referencias básicas de este controvertido debate: «Cuando se habla de ‘historia cultural de la sociedad’ o de la ‘historia socio-cultural’, en el fondo de este acercamiento lo que se encuentra es una idea central: que los ‘hechos sociales’, antes considerados como datos objetivos, cómo sólidas estructuras anteriores a los sujetos, son más bien el resultado de ‘construcciones’ realizadas por estos». Tampoco parece *infectada* de materialismo su concepción de la clase obrera: «La clase obrera –y lo mismo se podría predicar de las demás clases sociales– no es el resultado automático de las relaciones de producción o de la evolución económica: más bien se trata de una identidad forjada por los propios protagonistas a lo largo del tiempo». Añadiendo: «En todo caso [...] lo importante es señalar el acuerdo en un punto fundamental: que la clase obrera, en cuanto a sujeto colectivo, fue el resultado de un proceso de formación, entendido éste como la construcción cultural de una identidad». PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Presentación” en CRUZ, Rafael y id. (eds.), *Cultura y movilización..., op.cit.*, p. 10; y, id., “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en ibídem, pp. 202 y 203, respectivamente. Véase, asimismo, la valoración

«La crítica fundamental [a la historia sociocultural] es, una vez más, la pervivencia de algunas ideas heredadas de la historia social clásica: en especial, del predominio de la estructura económica y social a la hora de definir los intereses de los trabajadores [...]. Este ha sido, al final, el más grave error, frente al que se hace necesaria una nueva agenda de investigación»⁶⁰.

Calificada de “buena candidata” y de constituir una especie de “*marca española* que añadir al acervo historiográfico mundial”, la historia post-social parecía estar llamada a ocupar puestos de prestigio⁶¹. Con cierta *complacencia* se dejaba entrever: “Pero al menos parece que con esta nueva categoría hemos dado un paso adelante en la agenda de investigación centrada en el análisis de la formación histórica de los conceptos”⁶². Lo que no era obstáculo para que, al mismo tiempo, se denunciara su extremismo:

«En el fondo, lo que la historia post-social significa, al menos, en mi opinión, es una traslación al terrero que tradicionalmente se ha conocido como historia social de las versiones extremas del ‘giro lingüístico’»⁶³.

Y a partir de ahí vuelta al *centro* del debate historiográfico, tras recordar los *porqués* de tal situación:

«La razón es muy sencilla: frente al intento de asentar la nueva actitud historiografía en la concepción del lenguaje como un sistema de signos arbitrarios e independientes de la voluntad de los hombres, en Europa se vivían tiempos de insistencia en la libertad de los sujetos y de rechazo de las rígidas determinaciones estructurales de la historiografía anterior. Hubo que esperar, por eso, algunos años para que en la historia social, o post-social, vinculada a dicho *giro*, los sujetos volvieran a perder protagonismo e importancia a favor de un nuevo determinismo: en este caso, eso sí, determinismo por las estructuras lingüísticas, que venía a sustituir a la vieja determinación por las estructuras sociales, aunque manteniendo el mismo carácter rígido e impersonal de aquellas»⁶⁴.

Así pues, y tras denunciar una vez más –a partir de las tesis mantenidas, entre otros, por Gabrielle Spiegel⁶⁵– las “formas excesivamente rígidas en que han desembocado el giro lingüístico”⁶⁶– lo que se intuía es que se estaba ante una “acomodación revisionista”. Todavía más, pues, “[e]s sorprendente que, a pesar de la importancia del lenguaje en todo el planteamiento la historia postsocial, la reflexión sobre el mismo haya sido más bien escasa”⁶⁷.

positiva al respecto que tendría unos años antes de dicha obra, CABRERA, Miguel Ángel, “Developments in Contemporary..., *op.cit.*, p. 1022-ss.

⁶⁰ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*, p. 245.

⁶¹ *Ibidem*, p. 235.

⁶² *Ibidem*, p. 237.

⁶³ *Ibidem*, p. 238 [*cursiva* en el texto original].

⁶⁴ *Ibidem*, p. 239.

⁶⁵ Además de la cita obligada de, NOIRIEL, Gérard, *Sobre la crisis..., op.cit.*; se hacía mención específica a, CABRERA, Miguel Ángel, “La historia de la práctica: nuevas tendencias en historia tras el giro lingüístico” *id.* (ed.), *Más allá de..., op.cit.*, pp. 19-50.

⁶⁶ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*, p. 239.

⁶⁷ *Ibidem*, pp. 240-241. El mismo historiador quien partía de prácticamente los mismos marcos teóricos que Cabera –principalmente a través de Gareth S. Jones– en todo caso, tendría una posición –llamémosle– más moderada y aplicable, a la postre, al respecto de lo se llamaban las *categorías lingüísticas de las experiencias comunes*, cuando afirmaba: «En el examen de esos ingredientes culturales, parece imprescindible comenzar por el propio *Lenguaje*. En parte porque, como ha explicado Stedman Jones, el lenguaje no es un simple medio de expresión, sino que actúa como configurador de las experiencias, pero también y en un plano más elemental, porque mientras no existió una nomenclatura

Dejando caer, más adelante, la hipótesis de que se erraba al referirse a “lengua” cuando se trataba, en realidad, de “habla”. Lo que, a su vez, había tenido una nada despreciable consecuencia, “en la que los sujetos no desempeñan ningún papel, o sólo juegan el de instrumentos para la acción de los auténticos protagonistas”⁶⁸. En resumidas cuentas, “[q]uizá no era necesaria esta nueva vuelta de tuerca”, pues, “[m]ás bien parece haber sido una adición al planteamiento inicial, forzada por el deseo de incrementar la importancia de las estructuras lingüísticas”⁶⁹.

Tampoco se escatimarían en aquella ocasión críticas hacia las frecuentes contradicciones y *giros* en sus *tesis*. Precisaba como para salir de su *atasco teórico*, los historiadores post-sociales no habían tenido más remedio que acudir a Charles Taylor, y adoptar la fórmula del *imaginario social compartido*, un “termino que ha sustituido a otros como discurso o metanarrativa. En todo caso, ocupa el mismo lugar mediador que antes se asignaba a aquellos”⁷⁰.

Concluía aquella revisión, en cualquier caso, de *tono amable* cuando no *indulgente*, a partir de la lectura autocrítica de sus textos más conocidos al respecto⁷¹, y dejando apuntada una *sugerencia* a modo de recado.

«De lo dicho se podría concluir que en su análisis, Cabrera y sus discípulos han colocado a la historia del movimiento obrero en el mismo lecho en el que Proscuto tumbaba a sus víctimas, acortando o alargando sus miembros para que se ajustaran al tamaño del mismo»⁷².

A continuación se interrogaba: “¿cuáles son las causas de la aparición del movimiento obrero?”⁷³. Partiendo de las propias tesis de Cabrera expuestas anteriormente sobre la *identidad*

precisa, un conjunto básico de términos para referirse a la estructura social y las distintas entidades que la integran, fue imposible tener clara conciencia de la pertenencia a ellas mismas». Id., “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en CRUZ, Rafael y id. (eds.), *Cultura y movilización...*, *op.cit.*, p. 202. Véanse también el aparato crítico que emplea en la *nota 3* y *nota 4*, *ibidem*, p. 203.

⁶⁸ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*, p. 240.

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 241-242. Téngase aquí presente el debate entre Patrick Joyce y Oliver Stone sobre lo que Jorge Uría calificaría como los «los peligros y los excesos ‘irracionalistas’ de la nueva historia cultural» que tendría lugar en *Past & Present* a principio de los noventa. Sobre el mismo, URÍA, Jorge, “La historia social hoy” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, p. 242 y *nota 18*. Un debate que tenía precedentes como el mantenido por Joan Scott y otros autores en *International Labor and Working-Class History*. En esta ocasión, disponemos de su traducción al castellano [tan sólo se citará en dicho idioma] en *Historia Social*, nº 4, (1989): SCOTT, Joan W., “Sobre el lenguaje, el género y la historia de la clase obrera”, (81-98); PALMER, Bryan D., “Respuesta a Joan Scott” (pp. 99-110); STANSELL, Christine, “Respuesta a Joan Scott” (pp. 111-118); RABINBACH, Anson, “Racionalismo y utopía como lenguajes de la naturaleza: una nota” (pp. 119-126); SCOTT, Joan W., “Una respuesta a las críticas” (127-135).

⁷⁰ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*, p. 237.

⁷¹ ALVAREZ JUNCO, José y id., “Historia del movimiento...”, *op.cit.*; id., “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en CRUZ, Rafael y id. (eds.), *Cultura y movilización...*, *op.cit.*, 201-233. Aquí también se ha de tener más que presente: id., “El lenguaje de la ciudadanía en la España contemporánea” en id. (dir.), *De súbditos a...*, *op.cit.*. Véase asimismo el conjunto de trabajos críticos – por él considerados – que surgirían como respuesta a su aportación de 1982, en id., “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*, p. 246, *nota 29*. Complementétese dicha información tanto con lo apuntado en la *nota 10*, *nota 137* y *nota 138*.

⁷² *Ibidem*, p. 247.

⁷³ Una vez más, ténganse presentes las conclusiones del tantas veces citado estudio de Pérez Ledesma: «En cuanto a sujeto histórico, es decir como identidad colectiva disponible para la

de clase y la no realidad objetiva material, lanzaba la provocativa hipótesis –a modo de *recado* a la espera del consiguiente *acuse de recibo*– de que lo allí planteado era, sin más rodeos, una vuelta a los orígenes marxistas en relación a la lectura e interpretación de la clase *en sí* y *para sí*.

«Pensábamos que habíamos llegado a la tercera y definitiva fase de la historiografía del movimiento obrero, que dejaba atrás todas las formulaciones anteriores: en cambio, lo [que] encontramos es, al menos a mi juicio, una versión algo más compleja de la vieja separación marxista entre la clase ‘en sí’ y la clase ‘para sí’»⁷⁴.

Ahora bien, de cara concluir advertía como no se estaba ante “el eterno retorno de lo idéntico por el que suspiran otros practicantes de la historia social”, dándoles un sentido “gracias” a quienes han formulado el nuevo paradigma⁷⁵.

Desde otro *tono* y otra *perspectiva* diametralmente opuesta, el catedrático de Historia Contemporánea iba a salir al paso de lo publicado en el número monográfico de *Historia Social* –número 60, (2008)–. Por más que advirtiera, en aquella ocasión, como en España “donde no se discute o, en caso de hacerlo, las discusiones acaban en ataques personales”⁷⁶, el texto no dejaba de tener un cierto “aire” de ajuste de cuentas tan típico. Un enfoque esperable en tanto el *imaginario social común* tiende a identificar al propio Pérez Ledesma –así como a Jorge Uría– como el principal representante de la historia sociocultural⁷⁷.

Dividida sus críticas en dos apartados diferentes, no evitaría el autor, en momento alguno, en adjetivar a este tipo de *enfoque* –y su *prole*– como historia social con el permanente añadido de “clásica”, como antónimo de *nuevo*, y, por lo tanto, más difícil de *vender* en el saturado *mercado de la historia*. Puesto a la ingrata tarea de criticar a los *colegas* del gremio, detectaba en aquellos que habían sido *invitados* a la *encuesta* de *Historia Social*, una “doble actitud”:

«[D]e un sentimiento de nostalgia de las décadas gloriosas de 1960 y 1970, en las que la dedicación a la historia social estaba vinculada al deseo de cambiar el mundo, por un lado; y, por otro, de la perplejidad ante la situación actual de la disciplina, definida como contradictoria, confusa o ambigua»⁷⁸.

movilización, la clase obrera fue el resultado de la acción continuada de los integrantes del movimiento obrero; fueron ellos quienes interpretaron las experiencias comunes de los trabajadores y difundieron los marcos conceptuales que permitían a estos últimos integrarse en una identidad colectiva. El lenguaje de clase, la formulación de conceptos como los de explotación y emancipación, la elaboración y difusión de mitos, rituales y símbolos: todos esos ingredientes hicieron posible la construcción cultural de una nueva identidad, y la paulatina sustitución de identidades precedentes o alternativas. Por supuesto, para que tal construcción tuviera éxito, eran necesarios algunos requisitos previos: entre ellos, el trabajo por cuenta ajena, el malestar provocado por las condiciones laborales y salariales, la desaparición de las expectativas de ascenso social, e incluso el temor a un deterioro de la situación existente. Pero también fue necesario convencer a categorías tan diversas como los jornaleros del campo, los obreros de los oficios tradicionales, los mineros y un reducido número de trabajadores industriales de que los rasgos comunes eran más relevantes que las peculiaridades de cada sector productivo. En España, las dos últimas décadas del XIX representaron el momento inicial de ese proceso». Id., “Presentación” en CRUZ, Rafael y id. (eds.), *Cultura y movilización...*, *op.cit.*, p. 233.

⁷⁴ Id., “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*, p. 248.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 228.

⁷⁷ PIQUERAS, José Antonio A. y SANZ, Vicent, “The social History...”, *op.cit.*, p. 481.

⁷⁸ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*, p. 230.

Con un fundado optimismo remataría la descripción añadiendo: “se muestran especialmente perplejos ante la mezcla de buenos resultados de la disciplina e incertidumbres sobre sus posibilidades de futuro”⁷⁹. No terminaba ahí el diagnóstico sobre las posiciones *irredentas* de este grupo, pues al mismo tiempo, “el clima general que la encuesta refleja tiene que ver sobre todo con el desconcierto y la incertidumbre”. Discernía, a continuación, Pérez Ledesma en un análisis un tanto dicotómico, que la respuesta a lo anterior se debía a que la “historia social ha sido desplazada, o si se quiere dominada, por la historia cultural”⁸⁰. Especialmente irritante, a la postre, le parecía el “militantismo” de uno de los participantes, Núñez Seixas, quien atribuía todos los males de la historia social (*clásica*) al creciente *relativismo*. Una explicación, a partir de la cual, se deducía la posible representación del “enemigo” en palabras del Pérez Ledesma⁸¹.

«Porque bajo el rótulo de ‘relativismo’ se esconden toda una serie de amenazas y peligros: entre ellos, el olvido de las estructuras y el predominio de las percepciones: la atribución a cultura y los imaginario de un papel autónomo, y el desconocimiento de los factores independientes de la voluntad de los individuos»⁸².

El escenario no podía dejar de ser más que preocupante. Todo ello dentro de la dinámica autocrítica –a la par que autodestructiva– tan habitual en estos casos. No tanto, por la más que palpable falta de percepción de la realidad investigadora por parte de los propios participantes en la *encuesta*, o por ciertos *tics* propios del militantismo “radical” juvenil que aparecían a la menor ocasión en base a idealizados pasados⁸³; el problema real –y aquí sí perceptible– es que en el campo del debate historiográfico (teórico) volvía a aparecer con todos sus significados –lingüísticos, para mayor detalle– el concepto de “enemigo”.

De cualquiera de las formas, la mayor de sus atenciones estarían dirigidas al texto de José Antonio Piqueras, *El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales*. Y aquí la ironía va a dar paso, sencillamente, a la demolición del artículo en cuestión y de su autor. O dicho de otra forma, resulta harto difícil diferenciar, en ocasiones, la crítica académica de la estrictamente personal. Hasta tal punto, que frente a los argumentos y reflexiones de peso

⁷⁹ *Ibídem*.

⁸⁰ *Ibídem*, p. 231.

⁸¹ NÚÑEZ SEIXA, Xosé Manuel, “La historia social ante el dominio de la historia cultural: algunas reflexiones” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, pp. 177-184.

⁸² PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*, p. 232.

⁸³ Pasan los años y los *argumentos* contra los historiadores sociales (clásicos) siguen siendo los mismos que hace ya unas décadas. Escasa o nula la originalidad de cualquier posible crítica. Citaremos dos *contra-ejemplos*. Primero, como trajo a colación Pere Gabriel: «Quedan claros los elementos fundamentales de la imagen estándar sobre la historiografía social obrera española: una excesiva ideologización y politización quizás justificable en su momento, en tiempos de luchas antifranquistas, pero obsoleta y crepuscular en la actualidad: la incapacidad de superar el institucionalismo y el descriptivismo: el uso y el abuso de métodos de análisis de historia más tradicional, identifica ésta con un historicismo político trasnochado». GABRIEL, Pere, “A vueltas y..., *op.cit.*, p. 44. Recuérdese aquí también los comentarios al respecto de Carlos Forcadell: «La conservación y recuperación del viejo y venerable concepto del movimiento obrero no es un asunto por el que circule la moda historiográfica, y quienes intentar práctica su revisión como objeto histórico real y significativo, por mucho que renueven sus marcos teóricos, metodológicos e interpretativos, corren el riesgo de acabar siendo sospechosos de tercos e irredentos militantes anclados en un pasado ficticio o inventado». FORCADELL, Carlos, “Sindicalismo y movimiento obrero: La recuperación historiográfica de las clases trabajadoras” en ORTIZ HERAS, Manuel, RUIZ, David y SÁNCHEZ, Isidro (coords.), *Movimientos sociales y...*, *op.cit.*, p. 95. Sobre esta cuestión también advertirían también, PIQUERAS, José Antonio A. y SANZ, Vicent, “The social History..., *op.cit.*, 467.

esgrimidos a la hora hacer balance con respecto a las tesis de Cabrera, aquí tan sólo se detenía en aquellas cuestiones más relacionadas con las “miserias” de la academia.

La metáfora elegida en aquella ocasión sería “La pérdida del paraíso”. De esta forma, si el profesor José Antonio Piqueras empleó el relato de Robinson Crusoe para abordar su crítica, Manuel Pérez Ledesma lo compara con el relato bíblico del *Génesis* para hacer otro tanto:

«A diferencia de la narración bíblica, no queda claro cuál fue el momento exacto en el que los historiadores abandonaron el paraíso. Sólo se precisa que fue ‘en el curso de la dos últimas décadas’ cuando se produjo la marcha. Tampoco se explica si hubo alguna divinidad o fuerza exterior que les expulsara del edén. Lo que, en todo caso, sí queda claro es que hubo una serpiente tentadora, que por ser ‘el animal más astuto’ de los creados por Dios logró arrastrar a comer del árbol prohibido».

Tras el paisaje bíblico de marras se llevaría a cabo una crítica demoledora, aunque tan común en el gremio cuando se *tocan* materias sensibles: “el análisis responde al «marxismo inquisitorial» más clásico: lo que atrajo a los historiadores sociales fueron las ventajas personales”⁸⁴. Un dato y un argumento altamente relevantes, pues, hasta entonces y por lo que se conocía y se enseñaba en las facultades de Historia, el *marxismo* como ideología y como paradigma llevaba enterrado hace más de dos décadas, sin que nadie hubiese emprendido la tarea de resucitarlo.

Sin tiempo para dar por bienvenido al *nuevo marxismo*, Pérez Ledesma recordaba, en términos bíblicos,

«Menos mal que, como saben los teólogos, el relato de la caída va siempre seguido por un relato de la redención y la salvación final. De acuerdo a esto último, la historia social será capaz de olvidar los cantos de sirena de quienes la han llevado por tan mal camino para volver a disfrutar de ‘próspera vida’»⁸⁵.

Rechazado de plano cualquier acatamiento del supuesto “acto fe” que (supuestamente) pedía Piqueras, concluía su demoledora crítica con las siguientes palabras:

«Si alguien da crédito a los relatos sobre la caída y la redención propios de las religiones, o a las narraciones similares, aunque secularizadas, de determinadas ideologías con una fuerte carga mítica, también podrá aceptar una argumentación como a la aquí desglosada. Al resto, a los descreídos, lo que nos toca es pedir pruebas: en concreto, el tipo de pruebas a las que los historiadores estamos acostumbrados»⁸⁶.

Aunque a continuación nos vamos a detener en el artículo del “enemigo” Piqueras, y más allá de si se puede o no estar de acuerdo con las tesis de Pérez Ledesma, se observa en este caso el recurso a débiles como manidos argumentos: desde el marxismo como ideología trasnochada a su lectura posmoderna como religión política. Teniendo además la impresión de que poco o nada se aporta de *nuevo* al debate, así como se dinamitan los posibles consensos –y no son pocos– entre la historia social (clásica) y la historia sociocultural.

Rejuvenecer un *viejo-nuevo producto* no resulta tarea sencilla. Más cuando tras muchos años de *relativos y prudentes* silencios, se decide a acometer tal revisión sin complejos ni ahorro de críticas. Los riesgos intelectuales pero también académicos de proceder de tal forma,

⁸⁴ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*, p. 233. El texto al que alude se puede leer en la *nota* 99. Tiempo antes, el mismo historiador de cara a referirse a determinadas lecturas, hablaría de los «textos sagrados (de los textos sagrados del marxismo, por supuesto)». Categoría en la que, a buen seguro, habría que incluir alguna reciente aportación. Id., “Historia del movimiento..., *op.cit.*, p. 10.

⁸⁵ Id., “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*, p. 234.

⁸⁶ *Ibíd.*, pp. 234-235.

no son pocos. Desde que te tilden de *revisionista* pasando por *radical* –o peyorativamente marxista como acabamos de ver– hasta el más injusto de todos: el de querer defender una “parcela” historiográfica en términos personales.

Como en parte se ha adelantado –y así lo remarcaba el propio Pérez Ledesma– en nuestro caso ha sido más que común entender e interpretar las críticas como ataques personales. A lo que se añade otra inveterada “tradición taurina”: observar desde la grada el correspondiente *baño de sangre*, sin que salpique a los observadores más o menos atentos. No faltan los ejemplos al respecto⁸⁷. Pero también existe una segunda modalidad de uso común en el gremio: el *proceso de etiquetaje*, que tiene una gran capacidad simbólica y normativa de establecer *bandos y enemigos* en diferentes *trincheras*⁸⁸. Acompañándose el mismo, generalmente, de la *descalificación gratuita* sin aportar argumentos ni respuestas. *Descalificación* motivada las más de las veces por las simpatías y anti-simpatías del personaje en cuestión o en otros tantos casos, por cuestiones llameémosles políticas –cuando no ideológicas– y que tienden a buscar determinados *consensos y favores personales*⁸⁹. Un proceso del que es difícil escapar, más aún cuando se indaga por la historia de la historiografía y a quien se lee y se critica no dejan de ser *colegas* del gremio. A ello se suma, por último, la más extendida opción: el *silencio* y/o la *omisión* de la que poco o nada cabe añadir más.

⁸⁷ Nos referimos aquí a lo que sucedió en el dossier monográfico, *Generaciones y memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria*, en *Hispania Nova*, nº 6/7, (2006/2007) a raíz de la publicación del artículo de Francisco Espinosa –“De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar”– y las sucesivas contestaciones de Santos Juliá –“De nuestras memorias y nuestras miserias”– y de Pedro Ruiz Torres –“De perplejidades y confusiones a propósito de nuestras memorias”–. Aunque las siguientes palabras tienen no poco de ‘egohistoria’ –en tanto coordinador de la citada publicación– dicho debate sería ampliamente debatido de *puertas para adentro*. De hecho, constituyó una referencia clave en no pocas conversaciones y foros académicos –a pesar de que en pocas ocasiones se citara explícitamente– y ello sin que ninguno de los *colegas de profesión* –tal y como posteriormente han ido confirmando– quisiera entrar en el mismo, a pesar de que las puertas de la revista siempre estuvieron abiertas. Una revisión del mismo en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Memorias, historia, derechos humanos, políticas públicas. Reflexiones en torno a la práctica historiográfica. Un balance revisitado” en ARÓSTEGUI, Julio y id. (eds.), *Generaciones y memoria...*, *op.cit.*.

⁸⁸ Sobre todas estas cuestiones nos hemos detenidamente en, id., “Las vicisitudes del historiador en su sociedad: una propuesta de diálogo” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio, GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, SOUTO KUSTRIÑ, Sandra y BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés (coords.), *El valor de...*, *op.cit.*.

⁸⁹ El historiador Pablo Sánchez León resolvería el engorroso problema de referenciar a una de las voces autorizadas en dicho debate, con un simple y contundente *adjetivo*: «diatriba». Y ello en una *nota a pie* de página, que, a la postre, siempre resulta más cómodo. Una más que *pertinente* observación en la presentación de la reedición un libro ya clásico, *Historia social/sociología histórica* de Santos Juliá. Al mismo tiempo, en el propio cuerpo del texto no tendría inconveniente en afirmar: «[L]a historia social ha perdido el puesto de princesa aspirante al trono con el que algunos llegaron a soñar para ella en los años ochenta. Hoy día, según suele reconocerse de forma convencional, la modalidad de perspectiva que practica la mayoría de los historiadores recibe la vaga denominación de ‘historia cultural’». Y más adelante planteaba su particular contribución al debate al aquí nos estamos refiriendo: «En este escenario, la perdurable mistificación de la etiqueta de ‘historia social’ resulta contraproducente. Pues desde el parapeto institucional que sigue ofreciendo, una parte no desdeñable y autorizada de los historiadores profesionales –que va más allá de los historiadores sociales– se permite reaccionar de forma despectiva cuando no agresiva contra propuestas que contienen sugestivas innovaciones no sólo teóricas y metodológicas sino además epistemológicas, un terreno éste en el que los historiadores sociales se mueven en particular desventaja y en el que tienden a confundir molinos con gigantes». SÁNCHEZ LEÓN, Pablo, “Prólogo a la nueva edición. *Historia social/sociología histórica*: retorno a un futuro pasado” en JULIÁ, Santos, *Historia social/sociología histórica*, Madrid, Siglo XXI, 2010, pp. XXXIV, *nota 14*, XXV y XXVII, respectivamente.

Es en este mismo escenario de *correlación de fuerzas* –que dirían los “viejos camaradas”– en el que se ha de inscribir la aportación de José Antonio Piqueras. Más que una perspectiva *crítica* y/o *alternativa*, se está ante un enfoque a *contracorriente*. O dicho de otra forma, *disidente* de los consensos historiográficos hegemónicos⁹⁰. Visto lo visto, y antes de entrar en el propio texto, ¿es tan radical y hiriente el texto de Piqueras? No creemos que sea así. Pero sobre todo surge otra pregunta, posiblemente, más relevante: ¿por qué tras tantos años criticando –sin ahorro de *adjetivos*– duramente a la historia social (clásica) –y sin que desde los propios historiadores sociales (clásicos) se ofrecieran mayores respuestas y contraargumentos– a la primera contestación seria y en profundidad tan sólo se la ha contestado –cuando ha sido así– con tanta virulencia? En fin, ni siquiera se ha tenido la *sutiliza* de preguntarse sobre sí lo allí dicho puede ser útil o no para el campo de la historiografía.

«A la vuelta de toda una época, la Historia que había pasado por más innovadora, específicamente la historia social, se nos ha hecho, en gran medida, historia cultural»⁹¹.

Con esta misma premisa se inicia *El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales*. Una *idea-fuerza* aceptada por la mayor parte de la academia, sin que hasta entonces nadie levantara la *voz de alarma*. Como también ha sido más común de lo que pudiera pensarse, cuestionar ciertas *derivadas*, llámese o no, de la *historia social*, en especial la que patrocina fervorosamente la categoría, en términos históricos, del *lenguaje*⁹². Es decir, lo que Piqueras denomina como el paso a la “historia singular”:

«La historia de las sociedades, de las condiciones y las fuerzas sociales [...] ha cedido su lugar a la historia singular: el sujeto, el pequeño grupo, la comunidad local. Del mismo modo, el análisis y la explicación de los fenómenos estudiados sucumben al esfuerzo comprensivo, la exploración de causas se inclina ante la indagación de las motivaciones, los hechos y las acciones se supeditan al discurso y el discurso, a menudo, al lenguaje y por qué no, al símbolo»⁹³.

Añadiendo:

«El lenguaje dirá la corriente posmoderna, es a la postre la única realidad construida aprehensible mediante las oportunas descodificaciones y, en consecuencia, la historia cuando más cerca estaba de ser admitida entre las ciencias sociales, acaba convertida en una suerte de semiótica»⁹⁴.

⁹⁰ Recuérdense las tesis apuntadas por, PARENTI, Michael, *La historia como...*, *op.cit.*.

⁹¹ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 59.

⁹² Un ejemplo entre otros muchos: «Podríamos imaginar un escenario en el que un grupo de trabajadores, sindicados o no, de los años veinte o treinta, o de los setenta reunidos en el tajo, en la taberna, en la casa del pueblo, o en la sede del sindicato, se enteraran por boca de un historiador –del mismo que puede utilizarlos, como fuentes orales– que estaban sumidos en unas redes informales de solidaridad, participando en acciones de protesta institucionales o informales, posiblemente en el mismo día y lugar, que estaban ordenando lingüísticamente sus experiencias, o aprendiendo nuevos códigos lingüísticos cuando leían *El Socialista*, *Tierra y Libertad* o *Mundo Obrero* a la vez que construían una nueva identidad cultural mediante su participación en acciones colectivas [...]. Las categorías analíticas e historiográficas son necesarias, siempre con la condición de que nos aproximen a la realidad, pero perfectamente prescindibles, o cuando menos dudosas, si el resultado de su aplicación es enajenarnos, por la vía de la ascensión a los cielos académicos y gremiales, de la realidad histórica concreta». FORCADELL, Carlos, “Sindicalismo y movimiento obrero: La recuperación historiográfica de las clases trabajadoras” en ORTIZ HERAS, Manuel, RUIZ, David y SÁNCHEZ, Isidro (coords.), *Movimientos sociales y...*, *op.cit.*, pp. 262-263.

⁹³ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 59.

⁹⁴ *Ibídem*.

Si hasta aquí es difícil percibir –al menos a nuestro juicio– algún *rasgo* o *signo* de radicalismo, tampoco parece que se pueda achacar al *marxismo inquisitorial* –o *vulgar*– el cuestionamiento de la lógica misma –y no sólo historiográfica– cuando se ha procedido a *desconstruir* y *vaciar* de todo el contenido material a la clase social así como a la “asociación clase-política”, a partir de ciertas interpretaciones en *boga*.

«Ahora la vieja asociación clase-política sería cuestionada en sus fundamentos desde posiciones epistemológicas al considerarse que la clase es un enunciado antes que un aspecto de la realidad social, y como tal, no sólo es producto del lenguaje sino que la identidad colectiva de sus eventuales integrantes es fruto de una relación que se basa en sistema de diferencias (lo que podemos admitir, con Marx y Bourdieu) pero se concreta en la adhesión subjetiva a un imaginario construido por el discurso y otros aditamentos simbólicos que, siendo esencialmente culturales, no dependen de *constructos* externos a los sujetos, cualesquiera que sean estos y del grado de incidencia que pudiéramos admitir de cada uno de ellos»⁹⁵.

Acostumbrados y socializados en las “buenas formas” académicas, lo que, en ningún caso, es de recibo que expuestos tan argumentos tan *razonables*, se tenga la “osadía” de cuestionar los *usos* y *costumbres* del “mercado (comercial) de la historia”. ¿Mero *ajuste de cuentas* (o en su defecto, mero “pataleo corporativista”) o denuncia de una realidad conocida y asumida por todos y todas? Pues lo que a continuación viene a *denunciar* de forma abierta Piqueras en el texto es, sencillamente, como los productos historiográficos culturales, a través de su progresiva desideologización, han tenido no sólo mejor *salida comercial* sino más y mejor aceptación dentro del terreno académico, además de otra suerte de promociones profesionales. Si ya en la *Presentación* como en el *Estado de la cuestión* nos referíamos a las predominantes interpretaciones “amables” con respecto a la época socialista⁹⁶, otro tanto se puede decir aquí:

«Aquí, para muchos, la historia cultural es a la historia social anterior algo parecido a lo que ha supuesto el nacionalismo respecto al comunismo soviético después de su hundimiento: una suerte de refugio identitario capaz de diluir y ocultar ideologías opuestas, viejas controversias, proyectos hegemónicos; posee la virtud, además, de reducir el conflicto a términos inmateriales, excluyendo algunos de los aspectos más controvertidos del análisis histórico»⁹⁷.

Con todo, la *crítica historiográfica* tiene unos límites, según las antes citadas *buenas formas académicas*. Y a partir de aquí se da una doble opción: *darse* o *no darse* por aludido. Precisamente, por *aludido* se daría Pérez Ledesma cuando denunciaba a la alusión a las *ventajas personales* de las que hablaba Piqueras⁹⁸. Es justamente el siguiente párrafo el que ha levantado todas las *críticas* y las *irás*, y el que ha facilitado a la postre crear la *figura* del “enemigo

⁹⁵ Ibídem, p. 60. A continuación también fundamentaría su crítica sobre las incapacidades de determinados enfoques, en relación a ofrecer una explicación razonada y plausible al *conflicto*: «Los ensayos por explicar la construcción esencialmente cultural de la clase social, además de ofrecernos una variante asimismo discursiva y no menos contingente, enajenan las acciones colectivas de las condiciones materiales de producción y subsistencia y hasta el presente se han mostrado incapaces de ofrecer una explicación razonable del conflicto, que de manera invariable se reconduce a motivaciones exclusivamente políticas en la línea apuntada más arriba». Ibídem, p. 61.

⁹⁶ En concreto, “2.11. La historiografía académica y profesional: una *agenda investigadora* prácticamente por inaugurar”.

⁹⁷ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 61.

⁹⁸ Resulta, al menos, llamativo que crítica similar realizada por Javier Paniagua no concitará las críticas pertinentes: «Nunca ha habido en el mundo académico, español e internacional, tanta gente viviendo de la historia (profesores e investigadores). Todos ellos buscando su espacio e intentando superar la monotonía de los discursos. Labrándose con sus trabajos un porvenir o manteniendo el estatus adquirido, y abriéndose en muchos casos un camino en el mercado de libros de divulgación para el gran público». PANIAGUA, Javier, “La historia social en el diván del psicoanalista” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, p. 199.

común”, desatendiendo, en adelante, las no pocas propuestas e interrogantes que se formulan en el texto.

«La historia cultural ofrece, por último, dos consecuencias no necesariamente buscadas por quienes hacen de ello objeto de dedicación [...]. En primer lugar, su aparente asepsia ideológica y política la convierte en particularmente grata a las fundaciones y entidades privadas o semipúblicas que ejercen el mecenazgo sobre las artes, las ciencias y las letras: en segundo término, si la historia cultural permite ser abordada de maneras muy distintas, incluidas las específicamente empíricas, admite un tipo de estudio que puede prescindir del trabajo laborioso, prolongado, paciente, de resultados a veces modestos, propio de la investigación en archivos con fuentes primarias. Si bien podemos encontrar historia cultural de una sofisticación asombrosa, es mucho más común la producción estandarizada de factura *prêt à porter*, planificada y ejecutada en un tiempo récord a fin de atender las urgencias de la carrera curricular»⁹⁹.

Por más que la anterior crítica constituya una constante fuente de conversación dentro del gremio, a la hora de hacer notar determinadas proyecciones *fulgurantes*, a base de una producción historiográfica incesante más allá de su calidad y fuentes empleadas; estas y otras cuestiones han de reservarse al *conocimiento* “*off the record*”, si no se quiere correr el riesgo de auto-convertirse en el “chivo expiatorio” de turno.

No terminaría ahí el atrevimiento –y digámoslo de forma clara, la *irreverencia* y *falta de respecto*– del profesor Piqueras. Resulta además que rescataría de un “tenebroso” pasado lo que de útil tendría el marxismo en relación a la historia social. Actitud intelectual rara vez promocionada en una revista científica. Y además relacionada con la historia contemporánea. Así pues, tras recorrer algunos de los caminos por los que ha pasado la profesión –siempre sujeta a esa lucha entre el *historicismo* y el *relativismo*¹⁰⁰– se detendría en la *suerte académica* del marxismo dentro y fuera de nuestras fronteras, recordando, en primer lugar, como el mismo,

⁹⁹ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 61. Apuntando también: «Da la impresión que el mercado es demasiado exigente e impone a la producción histórica una disyuntiva: o es capaz de ofrecer mercancías atractivas y, como la moda, renovada por temporadas para que el negocio se mueva, o esa producción histórica recibe el calificativo de ‘excesivamente académica’, un estigma terrible que la confina a los circuitos cada vez más marginales de las ediciones universitarias, donde con la excepción de unos pocos sellos, las novedades son leídas y reseñadas por un corto número de expertos que confían ser correspondidos por lectores, citas y reseñas. El mercado tiene sus reglas y la reciprocidad entre oferta y demanda tiene sus mediadores». Ibídem. Tiempo antes sobre la profesionalización del campo de la historiografía el autor realizaría una serie de apuntes críticos: PIQUERAS, José Antonio A. y SANZ, Vicent, “The social History..., *op.cit.*, cuando afirmaba: “Once the transition to democracy had finished and with the Socialist Party’s electoral victory in 1982, it would appear that a cycle interrupted by the civil war and Franco’s dictatorship had come to an end. However, what should have been a great leap forward after the change caught the latest and most numerous generation of historians of working-class movements writing or finishing their doctoral theses or other research projects using postulates which were categorically considered as ‘old history’ –whatever the meaning of ‘old’ may be here– instead of using the new approaches. While there was talk of renewal, the reality of the 1980s seemed to indicate that what had aged was not the means of tackling the history of workers, but rather the history of work itself as a research subject». Ibídem, pp. 473-474. De muy similar opinión sería Rubén Vega –sin que entonces saltara tampoco ninguna voz de alarma– quien situaba el punto de inflexión en relación a la desideologización tras la victoria socialista de 1982: «A su vez, para los historiadores especializados, el estudio del movimiento obrero ha perdido las connotaciones militantes que otrora le acompañaron, facilitando cierta asepsia ejercida desde académicas torres de marfil, cuando no se propicia un abierto revisionismo». VEGA, Rubén, “Cortocircuitos de la memoria. Acerca de un proyecto de conmemoración”, *Sociología del Trabajo*, nº 50, (2003/2004), p. 103, *nota* 28.

¹⁰⁰ Todo ello con crítica incluida a Santos Juliá. PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 64, *nota* 10, al respecto de, JULIÁ, Santos, “La historia social y la historiografía española”, *Ayer*, nº 10, (1993), pp. 29-46.

“ha supuesto uno de los ejes políticos, ideológicos y culturales más extensos y prolíficos”, y remarcando su ligazón con el propio origen de la historia social:

«Partiendo de las contribuciones teóricas y conceptuales de la economía clásica a la economía política, que entonces comprende también el embrión de lo que será la *historia social*, Marx avanza un paso decisivo en la pretensión de constituir la Historia en ciencia cuando propone *objetivar lo subjetivo*»¹⁰¹.

Como bien recuerda, además, ha de tenerse presente como “se ha exagerado el predominio marxista”¹⁰². El interrogante formulado no deja lugar a dudas: “¿Alguien en su sano juicio podría sostener que ejercieron un control que asegurara su reproducción y el ejercicio de una hegemonía intelectual en el medio?”¹⁰³. Más todavía en España –como trae a colación el mismo autor– en donde tras su irrupción “en la historiografía a finales de los sesenta, confundida la opción metodológica con el compromiso político contra la dictadura”, rápidamente se desinflaría “el *boom* de la historiografía marxista”, tras el “afianzamiento de un sistema de partidos parecido al de la Europa atlántica, con una izquierda socialdemócrata” en el poder¹⁰⁴.

Exorcizadas las posibles ramificaciones de un *marxismo* “marca española”, José Antonio Piqueras tendría el *sano* atrevimiento de esbozar una posible *definición* de *historia social*, que, sin embargo, se *conjugaba* en un pasado, eso sí, reciente. Un tiempo pretérito que para demás detractores, sin ningún género de dudas, no dejaba de ser un mero recurso nostálgico de *todo tiempo pasado fue mejor*:

«El resultado es que denominamos historia social a cosas y tendencias dispares en la que en su época dorada es posible establecer algunas matrices comunes: en cuanto a sus preocupaciones, la historia social se interesaba por explicar la sociedad del pasado en movimiento; comprende la sociedad como una totalidad interrelacionada –bien que este fue uno de los primeros consensos en resquebrajarse–; concede un lugar preferente a los colectivos humanos y a las fuerzas sociales, dedicando una atención destacada a las clases; y entiende la existencia de una realidad material inseparable (subyacente, determinante o coadyuvante) de la acción social. La historia social se interesaba por cuestiones relacionadas con las estructuras y los cambios, con la demografía en su sentido más amplio –población, familia, migraciones–, con el dominio y la explotación, el control social y la resistencia a cada uno de esos aspectos»¹⁰⁵.

Una definición que completaba de la siguiente forma:

¹⁰¹ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 66.

¹⁰² *Ibídem*, p. 66. Téngase aquí presente la *cita* inicial con la que se abría este capítulo por parte del mismo historiador.

¹⁰³ *Ibídem*, p. 68.

¹⁰⁴ *Ibídem*.

¹⁰⁵ *Ibídem*, p. 69. Conviene aquí detenerse en los elementos que a juicio de Jürgen Kocka también vendrían a definir la historia social: «En primer lugar, los historiadores sociales rechazan las formas estrictas de individualismo [...]. En segundo lugar, los historiadores sociales no son amigos de la ‘balcanización’ historiográfica [...]. En tercer lugar, los historiadores sociales están convencidos de que es importante, aunque no suficiente, reconstruir percepciones, experiencias, discursos y hechos, pues tienen conciencia de las percepciones, las experiencias y los hechos tienen condiciones y consecuencias no necesariamente presentes en la mente de quienes perciben, experimentan, se comunican y actúan, de lo que se deduce la necesidad de analizar las múltiples interconexiones entre estructuras y procesos por una parte, y percepciones, experiencias, construcción de significados y voluntad de actuar, por otra. En cuarto lugar, los historiadores sociales buscan explicaciones, a diferencia de los culturales, que a menudo se conforman con preguntar cómo». KOCKA, Jürgen, “Historia social. Un Concepto relacional” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, p. 162.

«En su vertiente marxista, es además una historia política o que contempla la política, pues conforme a esta metodología las cuestiones del poder resultan inseparables de las sociales y de las acciones exteriorizan las contradicciones, las luchas y los anhelos colectivos»¹⁰⁶.

La pregunta que se formulara a continuación –“¿Podemos considerar, entonces, que la historia social ha concluido su agenda?”¹⁰⁷– puede resultar *banal* para los historiadores poco interesados en tales *lides* e *irritante* para los *expertos*, pero que, no obstante, indica la situación no tanto de *crisis* como de *debilidad* de lo que se suele “catalogar” como la *historia social clásica*¹⁰⁸. Un interrogante que antecedió a la tercera y última parte del citado largo artículo y que tenía por objeto –según el propio autor– el de “ocuparse de las cuestiones teóricas y metodológicas mediante el estudio de casos y la investigación”¹⁰⁹.

El dilema de Robinson sería el ejemplo metafórico elegido para desgranar sus puntos de análisis. A partir de la obra de Daniel Defoe lo que se va a presentar es una suma de contra-lecturas, desde los diversos ángulos existentes en el campo de la historia social.

«Esta era, en verdad, una situación excepcional, la historia de un hombre solo, ajeno a la sociedad y excluido de sus determinaciones. ¿Qué puede ser objeto de estudio, en tal caso, que guarde relación con la historia social clásica? Al parecer, en el mejor de los casos, los elementos disponibles dejan el camino expedito a la autoproclamada ‘nueva historia social’ y lleva de ventaja una perspectiva de historia cultural. Pensemos en ello»¹¹⁰.

Así con no pocas dosis de ironía y no poca sutileza metodológica, Piqueras recorre esta conocida historia universal en donde, en primer lugar, esboza las limitadas posibilidades –con sus consiguientes *pobres* resultados– de historiar la misma a través de enfoques como la microhistoria¹¹¹, lógicamente la historia sociocultural¹¹², el giro lingüístico¹¹³ y hasta la propia

¹⁰⁶ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, pp. 69-70. Una definición que completaba con su *método* y *técnicas* asociadas, y que más adelante remataba con las siguientes palabras: «Sin embargo, la historia social, específicamente la historia social orientada por el marxismo en tanto método analítico o teoría social, no se proponía atrapar la verdad objetiva, sino acceder a una explicación de la realidad histórica, perfectamente, reconocible, mediante al método de las aproximaciones sucesivas a esa realidad puesto que la materia resultaría en otro caso inaccesible por extensa y compleja, en modo alguno debido a problemas cognitivos». *Ibídem*, p. 85.

¹⁰⁷ *Ibídem*, p. 70.

¹⁰⁸ Téngase aquí presente la «persistente sensación de crisis» que ha dominado cualquier análisis de la historiografía de lo social desde los años ochenta. PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, “Expansión y retos de la historia social” en *¿Qué entendemos hoy...* *op.cit.*, p. 204. La propia Joan Sangster iría más lejos: «A lo largo de las dos últimas décadas, los análisis sobre la historia social como disciplina en crisis se han convertido en un subcampo en sí mismo». SANGSTER, Joan, “Historia Social” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, p. 213.

¹⁰⁹ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 70. El autor indicaba su punto de referencia intelectual: “Introduction”, *Past & Present*, nº 1, (1952), pp. I-IV. Asimismo apuntaría: «En lugar de entregarnos a la melancolía y atrincherarnos en una actitud defensiva, les propongo compartir una reflexión sobre cuestiones metodológicas con las que tropezamos los historiadores en nuestro trabajo habitual, al seleccionar la información, ordenarla e interrogarla, al situarla en un contexto determinado y deducir, en definitiva, unas interpretaciones sobre los hechos que vamos estableciendo». *Ibídem*.

¹¹⁰ *Ibídem*, p. 74.

¹¹¹ «La parte central del libro, aquella que se ocupa de la historia del naufragio solitario, e incluso los episodios que siguen hasta el rescate del protagonista, podría hacer las delicias de algunos enfoques y de subespecialidades recientes de esa disciplina que todavía llamamos Historia. El minimalismo del drama, desde luego, se presta a la microhistoria: aquí no se dan estructuras sobredeterminantes, nada que distraiga la atención del aspecto central, sino básicamente experiencia vivida y bastante local». *Ibídem*, p. 73.

antropología¹¹⁴. Sin embargo, para el autor no sólo es que esos mismos enfoques conlleven serios obstáculos teóricos a la par que metodológicos, sino que, en más de un caso, caen en la mera “especulación”, al obviar los contextos y las realidades materiales –pero también las inmateriales– que se encuentran detrás de las acciones –individuales y/o colectivas– de los seres humanos. De hecho, Piqueras, lo que termina aportando es una historia materialista sobre el asunto, que va desde el examen de los medios de producción hasta la crítica de la explotación, pasando por la formación inicial de una nueva clase social¹¹⁵. En resumen, el trasfondo de *El dilema de Robinson* ayuda a visualizar cómo sobre una misma historia, caben no pocas interpretaciones y ángulos de visión. Otra cuestión radicalmente diferente, y aquí está una de las claves para todo el debate –antes que el enfrentamiento o la crítica superficial– es sobre lo pertinente, o mejor dicho, lo que es relevante para la mejora de nuestro conocimiento histórico, aporta cada ángulo de análisis histórico expuesto.

En cualquier caso, y vamos concluyendo, lo más apreciable –así como lo más novedoso– del artículo de José Antonio Piqueras, es la búsqueda de la causa –y del *¿culpable?*– del actual estado de cosas, junto con una serie de apreciaciones acerca de las contribuciones de Marx y otros historiadores marxistas como Thompson. Apreciaciones que directamente han sido omitidas, a pesar de que las mismas hubieran contribuido a un posible debate fructífero. Intuye el historiador, tras la correspondiente autocritica desde la perspectiva marxista en tanto la misma

¹¹² «Cita una colección de devocionarios papistas y, dice, muchos otros volúmenes cuyos títulos omite [...]. ¡Ah, la biblioteca oculta del solitario Robinson! Al final, no eres lo que comes sino lo que lees [...]. El acto de escribir [en relación a los diarios de Robinson] debería proporcionarnos su estructura psicológica, la estructura del pensamiento [...] ¿Y qué podemos inferir de lo que ignoramos, de lo que oculta y sin embargo nos hubiera dado la diferencia del caso respecto a otras situaciones, como hubiera inquirido Georges Duby? [...]. Hemos aprendido a desconfiar de las fuentes y de las versiones, recordémoslo». Ibídem, p. 74.

¹¹³ «Al retornar a Inglaterra, Robinson, desde la individualidad sometida a aislamiento durante más de tres décadas, pudo muy bien recordar la conversación que había sostenido con su padre pocos antes de abandonar el hogar familiar. Su progenitor, incrédulo, hubiera sacudido la cabeza si alguien le hubiera dicho que la sensación de pertenencia a un determinado ‘rango’ o situación era creación del lenguaje o de un proyección ideal compartida, de un ‘imaginario’». Ibídem, p. 78.

¹¹⁴ «Había desarrollado una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad, pero al parecer muy poca para admitir la contrariedad de un mundo que no era como estaba dispuesto a aceptar. Ignoro si esta cuestión debería ocupar un puesto más destacado en la reflexión ‘historicista’ que propongo, de la lectura del clásico a los ojos de la historia social y cultural. Echamos de menos la descripción densa que desde la antropología cultural nos reclama Clifford Geertz». Ibídem, p. 75.

¹¹⁵ «Por lo que llevamos visto, Robinson contrae unas relaciones de producción determinadas por la propiedad de la tierra, la utilización de mano de obra esclava, el manejo del crédito y el provecho del comercio. Se integra en un colectivo reducido de sujetos con características similares, que comparten una forma de vida y unos intereses comunes, todavía limitados al terreno económico, pero apunta a la formación de una clase social. Aquí advertimos un ‘grado de clase’ como proponía Hobsbawm, conforme al incipiente nivel de relación y de conciencia de formación». Ibídem, p. 80. Se refiere aquí a lo que Hobsbawm explicaba de la siguiente forma: «Existe, por ejemplo –y no pretendo abundar en ello– la conocida dualidad marxiana del término de ‘clase’. En cierto sentido, es un fenómeno común a toda la historia posttribal, en otro, un producto de la moderna sociedad burguesa: puede tomarse casi como un producto analítico que sirve para aclarar fenómenos de otro modo inexplicables, o como un conjunto de personas que comparten una conciencia de grupo, bien sea por sí mismas, bien porque así las percibe otro grupo, o por ambas razones. Estos problemas de conciencia, a su vez, hacen reflexionar sobre el lenguaje de clase: el cambio constante y la superposición frecuente de los términos, a veces, poco realistas, con que se hacen este tipo de clasificaciones coetáneas sobre las que tan poco sabemos cuantitativamente [...]. Porque con la clase, también hay una cuestión de grados [...]. En general, hay un problema de relación entre las clasificaciones, que por fuerza son estáticas en cualquier momento dado, y de la realidad múltiple y variable que las subyace». HOBBSAWM, Eric J., “De la historia social a la historia de la sociedad”, *Historia Social*, nº 10 (1991) [1971], p. 19-20. Un texto siempre recordado por su conclusión: «Corren buenos tiempos para el historiador social». Ibídem, p. 25.

habría descuidado “la atención hacia intereses, modos de vida y cultura, o limitando la observación al primero de estos factores”¹¹⁶, que tras tanto *desconcierto* se encuentra la notable influencia de la sociología weberiana con Talcott Parsons a la cabeza¹¹⁷: a saber, a partir de su “modelo de sociología estructural-funcionalista”, lo que se habría terminado por privilegiar sería un “antideterminismo de la acción del individuo”. Y su vez lo anterior habría llevado a un individualismo metodológico”, en donde “la noción de *actor social* sustituye a la de la clase”. Sumado todo ello nos encontraríamos con la siguiente no fácil situación:

«La *acción social* o –más adelante, para otros– la *acción colectiva*, nociones que reemplazan las de movilización y lucha, las relaciones que definen al grupo o la clase, asimiladas a sistemas de códigos compartidos, dotados de significación y organizados mediante la cultura, por citar dos ‘innovaciones’, pueden ser instrumentos operativos en el plano abstracto y suponen una variante terminológica suficientemente extendida como para rechazarlas. Esas expresiones introducen connotaciones lo bastante pertinentes en ocasiones para ser tenidas en consideración, pero en la práctica del análisis concreto no resuelven ninguno de los problemas que se pretende atajar si son tomadas como alternativas a las nociones teóricas llamadas a sustituir»¹¹⁸.

Lo que termina llevándole a afirmar:

«Al final, con el pretexto de una sociedad inaprehensible, buscamos en cada individuo las claves de la relación social, del sistema que lo relaciona con el exterior: cada individuo se nos ofrece como un compendio, en definitiva, de la estructura social en la que se inscribe, lo que resulta un contrasentido, pues se espera del individuo que desentrañe un haz de interacciones que por definición implica a un número de ellos tan amplio como compleja llegue a ser esa estructura»¹¹⁹.

En este mismo marco, denuncia también como buena parte de los historiadores sociales –cuyos trabajos sitúa entre 1970 a 1990– a la hora de internarse por el estudio de *clase*, tras la “cita ritual” a Thompson en sus respectivas introducciones, “estaban muy lejos de asumir esos planteamientos, tanto los del historiador social inglés como los del teórico alemán [Marx] del siglo XIX”, en tanto, “servían sus investigaciones y comparaciones de estructuras cosificadas y codificadas”¹²⁰. Añadiríamos aquí que citar a Thompson –e inclusive *pregonar* la adhesión a sus tesis– venía a constituirse, en no pocas ocasiones, en un *rasgo diferenciador* –simbólico pero también categórico– con la que *distinguirse* de lo que se consideraba la escuela marxista clásica. No faltarían tampoco, los casos de intentos de apropiación de la paternidad española del *legado thompiano*.

De esta manera, lo que esboza Piqueras a continuación es otra *tesis fuerte* dentro de los mayoritarios consensos historiográficos:

«El análisis de clases efectuado por Edward P. Thompson pretendía salir al paso del economicismo mediante dos propuestas: de una parte recuperaba la cultura de clase como elemento esencial de la propia clase; de otra, comprendía en la noción ‘cultura’ la experiencia

¹¹⁶ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 81.

¹¹⁷ En concreto cita las siguientes referencias: PARSONS, Talcott, *El sistema social*, Madrid, Revista de Occidente, 1966; y, id., *La estructura de la acción social*, Madrid, Guadarrama, 1968.

¹¹⁸ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 82.

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 82. Afirmando por lo demás: «Sin duda, los patrones ideológicos de relación desempeñan un papel importante en la trama social, pero cuesta ver reducida la historia a la tarea de desentrañar significados ocultos en estructuras que en última instancia organiza la cultura». *Ibidem*.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 84. Aquí el propio Pérez Ledesma muchos años antes criticaría la «visión naturalista de la clase», a partir de ciertas lecturas de Marx y del mismo Thompson. PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Historia del movimiento...”, *op.cit.*, p. 10.

social –de manera destacada, la lucha de clases– como factor determinante en la formación de una clase social»¹²¹.

Sobre estos mismos asertos buena parte de la historia socio-cultural –y de aquellos que se han considerado deudores de la *segunda ruptura*, aunque poco o nada tuvieran que ver con lo propuesto en su día por Álvarez Junco y el propio Pérez Ledesma– se *agarrarían* –de forma literal o más elaborada, dependiendo de cada historiador– como rasgo *diferenciador propio*. Ahora bien, matiza el propio autor, a través de la relectura de *La formación histórica de la clase obrera inglesa* pero sobre todo de *Miseria de la Teoría*¹²², como en más de una ocasión se ha sobrevalorado –cuando no directamente *instrumentalizado*– el *énfasis culturalista* del propio Thompson:

«La consideración de la experiencia social dentro de la ‘cultura de clase’ y las premisas indicadas por el autor obligan a revisar la imputación de ‘culturalista’, tan frecuente hacia Thompson, en la medida en que la experiencia remite –no sólo pero también– a condiciones materiales y a relaciones de producción»¹²³.

No sólo, pues, además, según este mismo planteamiento las *novedades* en Thompson serían las mínimas¹²⁴, y lo que destacaría de su obra sería un mayor *énfasis* antes que una *nueva lectura* propiamente dicha:

¹²¹ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 83. Consúltase a los frecuentemente criticados –desde ciertas posiciones académicas antes que historiográficas– GENOVESE, Elisabeth y GENOVESE, Eugene, “La crisis política de la historia social. La lucha de clases como objeto y estudio”, *Historia Social*, nº 1, (1988), pp. 77-114 [publicado originalmente en, “The Political Crisis of Social History: A Marxian Perspective”, *Journal of Social History*, vol. X, nº 2, (1976), pp. 205-220]. Desde otra perspectiva, CAÍNZOS, Miguel Ángel, “Clase, acción y estructura: de E. P. Thompson al posmarxismo”, *Zona Abierta*, nº 50, (1989), pp. 1-69.

¹²² THOMPSON, Edward P., *La formación de...*, *op.cit.*; y, id., *Miseria de la teoría...*, *op.cit.*. Barcelona, Crítica, 1981. Por lo demás, véase lo apuntado en *Presentación*, nota 162 y nota 180.

¹²³ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 83.

¹²⁴ Recuérdesse como definía el propio Thompson *conciencia de clase*: «La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Podemos ver una cierta *lógica* en las respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias similares, pero no podemos formular ninguna *ley*. La conciencia de clase surge del mismo modo en distintos momentos y lugares, pero nunca surge *exactamente* de la misma forma. Hoy día existe la tentación, siempre presente, de suponer que la clase es una cosa. No fue tal en sentido que le dio Marx, en sus propios escritos de tipo histórico, aunque el error vicia muchos de los recientes escritos ‘marxistas’». Señalando unas líneas más adelante: «El problema es, por supuesto, cómo ese individuo llegó a tener este ‘papel social’ y cómo la organización social determinada [...] llegó a existir. Y estos son problemas históricos. Si detenemos la historia en un punto determinado, entonces no hay clases, sino simplemente una multitud de individuos con una multitud de experiencias. Pero si observamos a esos hombres a lo largo de un período suficiente de cambio social, observaremos pautas en sus relaciones, sus ideas y sus instituciones. La clase la definen los hombres mientras viven su propia historia, y al fin y al cabo está es su única definición». THOMPSON, Edward P., “Prefacio” en *Obra esencial Edward...*, *op.cit.* pp. 14-15 [correspondiente al “Prefacio” en *La formación de...*, *op.cit.*]. En otro texto hartamente conocido realizaría ocho pertinentes observaciones –«quizás, un poco cortante», advertiría– y visto lo anterior, tan sólo nos detendremos en la sexta: «[L]a clase en sentido heurístico es inseparable de la noción de ‘lucha de clase’. Desde mi punto de vista, se ha prestado una excesiva atención, a menudo de manera antihistórica, a la ‘clase’ y, en cambio, demasiado poca a la ‘lucha de clase’. A decir verdad, la lucha de clase me parece que es el concepto prioritario, en la medida en que es más universal [...]. Clase y conciencia de clase son siempre el último y no el primer escalón de un proceso». Id., “Algunas observaciones sobre clase y ‘falsa conciencia’”, *Historia Social*, nº 10, (1991) [1977], p. 29.

«Cuando Thompson expuso sus primeras ideas [...] no añadía nada nuevo a Marx en cuanto a la relevancia de la cultura sino en cuestión de énfasis: la discrepancia se producía al considerar Thompson que sin conciencia ni acción conforme a dicha conciencia no podía hablarse de clase social y que, por lo tanto, era inadecuado hablar de clase (*en sí*) a partir de las relaciones objetivas de producción. Para Thompson *clase* y *conciencia de clase* no son identidades separadas o consecutivas y, dado que la *clase* es devenir, tampoco puede deducirse de un corte estático ni como función de un modo de producción»¹²⁵.

La clave de toda esta problemática estaría, pues, en lo que cada vez constituye un *nuevo-viejo* consenso: el análisis determinista con el que se ha leído a Marx, cuando el propio pensador siempre rechazó cualquier *determinismo* en sus obras:

«En contra de lo que en ocasiones se afirma, y propaló el marxismo vulgar y el estructuralista, no existe en Marx un determinismo económico si por ello entendemos una relación causal invariable, directa y exclusiva [...]. Esto es, las condiciones materiales de existencia estarían en la base de la clase y propician un modo de vida, unos intereses y una cultura que vienen a estar conformes con aquellas condiciones materiales; son estas condiciones materiales de existencia y las distinciones consiguientes en el modo de vida, intereses y mentalidad –todo ello interrelacionado– lo que otorga identidad obrera y carácter diferencial a la clase al oponerla a otras clases»¹²⁶.

¹²⁵ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 84. En una línea bastante similar se ha expresado Ángeles Barrio: «La propuesta de E.P. Thompson ofrecía claves reales e identificables desde el punto de vista histórico y partía de una premisa inicial: los historiadores tienen conocimiento de la noción de clase como categoría histórica derivada de la observación del proceso social, lo que daba al concepto clase categoría de realidad objetiva y comprobable empíricamente, exigía algunas comprobaciones teóricas y metodológicas más antes de acometer las fuentes. El historiador, al situar en contextos históricos concretos las categorías teóricas, debía evitar la interferencia de la teoría en las evidencias históricas obtenidas, ya que podían inducirle a conclusiones erróneas acerca de las clases, su estructura, su comportamiento o su conciencia en las situaciones o contextos históricos analizados». Y apuntaba dos notas características del *legado thompsonian* acerca de la experiencia y de los sujetos históricos, que los impulsores de la historia post-social han omitido deliberadamente: «Thompson afirmaba que clase y conciencia de clase eran dos conceptos inseparables que, al ser aplicados a realidades históricas concretas, ponían de manifiesto que la experiencia era el factor determinante de la conciencia en el marco de la lucha de clases. La lucha de clases, desde ese punto de vista, no se producía porque las clases, predeterminadas en su grado de conciencia, se decidieran a luchar sino porque, en la experiencia de la explotación, se descubrían a sí mismas y se reconocían como tal clase»; «La recuperación del sujeto y la experiencia colectiva como elemento esencial de las identidades de clase, reduciendo al mínimo la determinación económica en el nivel de la conciencia, produjo una auténtica conmoción en el discurso canónico sobre las clases y los comportamientos clasistas [...] ofrecía una interpretación alternativa de las relaciones sociales, en la que reconocía condicionantes culturales en el proceso de formación de la clase y de la conciencia, aunque sin renunciar al concepto clave de dominación en las relaciones sociales. Esto conducía, por un lado, a reformar el procedimiento hermenéutico de la conciencia acudiendo, incluso, a nuevas fuentes para que su ‘elocuencia’ fuera ilustrativa para el historiador cuando no encontraba evidencia en las fuentes convencionales; y, por otro, exigía replantear la cuestión de la conciencia y la ideología lejos de cualquier modelo platónico preconcebido por el historiador acerca de la ‘verdadera’ o la ‘falsa’ conciencia, y las deformaciones ideológicas en el proceso de transformación de la ‘clase en sí’ en la ‘clase para sí’». BARRIO ALONSO, Ángeles, “Clase obrera y movimiento obrero: ¿Dos compañeros inseparables?” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*, pp. 94-95 y 96, respectivamente. De la misma autora, id., “Historia social y postsocial. ¿Un debate de ida y vuelta para la historia?” en CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo, FANDINO PÉREZ, Roberto y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Historia social, movimientos...*, *op.cit.*, pp. 61-84.

¹²⁶ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, pp. 83-84. Más adelante puntualizaba: «El *interés de clase* –que no excluye la rivalidad de ‘intereses’ entre los individuos que lo integran– proporciona la base de la oposición y la lucha. *Conjuntamente* con un *modo de vivir* y una *cultura* sería lo que aúna a una clase,

Este planteamiento no sólo es que choque frontalmente con los postulados *post-sociales*, sino que cuestiona la lectura teórica de los historiadores socioculturales, y devuelve a Marx –y a los marxistas– una consistencia analítica de primer orden. De hecho, y como trae a colación, “[e]n la historia, los temas, los métodos y los objetivos no son viejos o nuevos, sino relevantes o irrelevantes, útiles o banales”¹²⁷.

Como no podía ser de otra forma, *El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales*, concluye con una cerrada defensa de la *agenda investigadora* por delante de la historia social. Lamentos aparte como cuando se denunciaba –una vez más– la “incorporación indiscriminada” de todo tipo de estudios hasta “devaluar” la historia social en sus “mismos círculos”¹²⁸, se hacía mención a la “pérdida de certidumbres en la sociedad” que “conduce invariablemente a la pérdida de certidumbres en la disciplina que se ocupa de estudiar las sociedades del pasado”¹²⁹. Sumado a la “sacudida posmoderna” que ha conducido la “pretensión científica de la historia, reducida a una rama del saber erudito, una disciplina cultural de calidad estética”, se observaba como “rasgo dominante” el “conservadurismo”, así como la “inclinación de la inmensa mayoría de los historiadores a servirse de temas y técnicas tradicionales que han probado su eficacia”¹³⁰. En conjunto, “[l]a actividad del historiador, en suma, ha quedado convertida en un problema”, y lo que era más grave, “[l]a verdad histórica es inaccesible, nos dicen considerándose portadores de certezas epistemológicas”¹³¹. Y pese a todo la *vigencia* de la historia social del trabajo no podía ponerse en entredicho:

«Ciertamente, la historia social del trabajo, para muchos la modalidad *clásica* de historia social al estar referida al grupo más numeroso de las sociedades contemporáneas, conoce en los países industriales avanzados el síndrome de desorientación ante la recomposición del mundo laboral, la pérdida de definición de la clase trabajadora y el agotamiento de la perspectiva que de una y otra forma creía encontrarse ante una clase potencialmente transformadora del capitalismo y de la sociedad que le es inherente. Sin embargo, las perspectivas de estudio que ha abierto el presente posibilitan comprender mejor que hace tres o cuatro décadas, cuando vivió su edad de oro, los procesos de formación de la economía capitalista y su incidencia en la estructura social interna e internacional, pues dispone de un observatorio excepcional siempre y cuando adopte un método comparativo doble: pasado y presente (y viceversa) y transnacional

pues para Marx es inconcebible hablar de clase cuando se encuentra aislada, sin relación con otras y ajena al conflicto que se deriva de esa relación». *Ibíd.*

¹²⁷ *Ibíd.*, p. 84. A principios de los años noventa el propio Piqueras advertiría: «La reflexión sobre un modo de conocimiento histórico que está alcanzado una posición predominante y que, a tenor de las condiciones históricas vigentes, tiende a expandirse y consolidarse. Esa forma dominante de producir conocimientos, de hacer historia, consiste en la entronización del empirismo y en la *desautorización* de la práctica histórica». *id.*, “El abuso del método, un asalto a la teoría” en CASTILLO, Santiago (coord.), *La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas* [Actas del I Congreso de la Asociación de Historia Social, Zaragoza, 1990], Madrid, Siglo XXI, 1991, p. 88. Por otro lado, téngase también presente el trabajo, de PASAMAR, Gonzalo y PEIRÓ MARTÍN, Ignacio, *Historiografía y práctica social en España*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1987.

¹²⁸ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer..., op.cit.*, p. 85. En torno a la historia cultural se dejaba también un último *apunte*: «La revalorización de la esfera de la cultura como sistema primario de relación humana e histórica, y el reconocimiento de su capacidad de crear realidad social ha conducido a repensar el conjunto de interacciones hasta un absurdo que se compadece mal con la realidad material y el contexto de relaciones sociales». *Ibíd.* Una interpretación a la que se ha sumado James Amelang cuando hablaba de cómo «ahora triunfan [...] los productos de una cultura del pasado dominada por la trivialidad y la comercialidad». AMELANG, James, “En estado frágil” en *Formas de hacer..., op.cit.*, p. 131.

¹²⁹ PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer..., op.cit.*, p. 87.

¹³⁰ *Ibíd.*, pp. 88-87, respectivamente.

¹³¹ *Ibíd.*, p. 88.

(experiencias similares y experiencias disímiles) e intensifique más que nunca el diálogo y los préstamos con las ciencias sociales»¹³².

Llegado aquí, ¿fueron y son justas las contundentes críticas –desde *marxismo inquisitorial* a *diatriba*– al tantas veces citado texto de José Antonio Piqueras? ¿Puede y debe considerarle como el *enemigo* o *adversario* a combatir? Y puestos a la tarea, ¿cabe o no cabe discusión con sus postulados? Para poder acercarnos mejor, quizás, cabría interrogarse en torno a los *porqués* de tales reacciones. Primero, por el *tono poco amable* pero sobre todo *poco académico*. Segundo, por el cuestionamiento frontal del funcionamiento del “mercado académico”. Y tercero, por los nuevos interrogantes bosquejados que, en suma, refutan no pocos de los planteamientos dominantes. Y, sin embargo, creemos que, al menos, aporta tres elementos de reflexión a valorar detenidamente: a) la reivindicación de cuestiones históricas hace tiempo desterradas; b) relectura abierta de las obras de Marx pero sobre todo de Thompson; c) esbozo de lo que puede ser considerado ya no sólo la *historia social* sino propiamente Historia en mayúsculas.

A nivel estrictamente teórico el enfrentamiento parece estar claro, tras un tiempo de cierta tranquilidad y de algún que otro *disimulado rasgo optimista* previo¹³³. No es así en el campo de la investigación como a continuación veremos. Ahora bien, nos toca preguntarnos, ¿es posible e incluso viable un debate historiográfico con aquellos que cuestionan las bases del conocimiento historiográfico? Posible *sí*, viable con las mismas reglas de juego, *no*¹³⁴. A buen seguro, las *ansías* de la modernización historiográfica por parte de no pocos *colegas*, han llevado a extremos lo que puede ser considerado como parte de nuestros ámbitos de

¹³² *Ibíd.*, p. 85.

¹³³ En dos de los *estados de la cuestión* más citados – PIQUERAS, José Antonio A. y SANZ, Vicent, “The social History..., *op.cit.*; CABRERA, Miguel Ángel, “Developments in Contemporary..., *op.cit.* – publicados a la altura de 2005, precisamente, por dos de las *posiciones* radicalmente distantes, se concluía ambos balances si bien no con un *enfoque optimista*, al menos, con posiciones menos enfrentadas: ¿Qué ha pasado desde aquel entonces hasta los textos aquí examinados? A falta de más ‘pruebas’, lo desconocemos. Así, por ejemplo, Piqueras y Sanz, terminaban su texto diciendo: “Let us be optimistic. We are witnessing the birth of a more complex version of the history of work and workers which is a more technical, more factual, one which deals with a greater number of variables and which takes into account aspects of economic development and the techniques, organization and skills involved in work, of the productive processes and the way they interrelate at a national and international level. At the same time, it is understood that the life of the worker and his *raison d’être* is not confined to the world of work, but neither is it placed outside the productive area and, when this is the case, it converts the workers into a citizen, as if his or hers condition disappears when the siren sound or when he or she clocks off at the end of the day». Y para concluir, y tras repasar las nuevas perspectivas esbozadas por los *enfoques culturalistas*, se advertía: «There is one of the weak points which the history of work must overcome of it hopes to provide a tried and tested understanding of the past, when political and social affairs were so often linked together. Are there really enough reason to be optimistic?». PIQUERAS, José Antonio A. y SANZ, Vicent, “The social History..., *op.cit.*, p. 483. Por su parte, Cabrera –no sin cierto *tono victimista*– concluiría: «And even today, when cultural history is still in its infancy, there are already some historians who have taken a further theoretical step and have begun to use the analytical concepts of discourse and discursive construction. While this feeling that Spanish historians and struggling to keep up remains, there is no doubt that the forward march continues: indeed, that feeling is itself unequivocal proof of it». CABRERA, Miguel Ángel, “Developments in Contemporary..., *op.cit.*, p. 1023. Por cierto, un *tono victimista* en parte compartido por el propio Pérez Ledesma en una de sus más relevantes contribuciones: «Es verdad que el planteamiento que subyace a este conjunto de estudios no ha tenido hasta ahora una buena acogida entre los historiadores españoles. Los críticos, mucho más abundantes que los posibles defensores, le han hecho responsable de muchas de las desgracias que a su juicio afectan al desarrollo de la historiografía». PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Presentación” en CRUZ, Rafael y *id.* (eds.), *Cultura y movilización...*, *op.cit.*, p. 12.

¹³⁴ Interesante, al respecto, resultan las tesis mantenidas por, SCHMIDT-NOWARA, Christopher, “Las plantillas rotas de la historia, ¿qué viene después del giro lingüístico?”, *Historia Social*, nº 63, (2009), pp. 169-174.

conocimiento. En todo caso, pareciera que cuando se habla así –y aquí no faltan los ejemplos demagógicos– se estuviera defendiendo determinadas parcelas gremiales como remarcábamos al principio. Nada más lejos de la realidad. ¿Conservador? Tampoco creemos que pueda ser así catalogado, si se entiende la Historia como,

«la estricta aplicación de un modo de análisis teóricamente elaborado a la más compleja de las materias de las ciencias: las relaciones entre los hombres y las modalidades de sus cambios»¹³⁵.

O por recurrir en esta ocasión a lo que el propio Thompson describiera como la *lógica histórica*:

«Por ‘lógica histórica’ entiendo un método lógico de investigación adecuado a los materiales históricos, concebido, en el mayor grado posible, para contrastar hipótesis relativas a estructuras, causaciones, etcétera, y para eliminar procedimientos autoconfirmatorios [...]. El discurso de la demostración de la disciplina histórica consiste en un diálogo entre concepto y dato empírico, diálogo conducido por hipótesis sucesivas, por un lado, e investigación empírica por el otro. El interrogador es la lógica histórica; el instrumento interrogativo una hipótesis [...]; el que contesta es el dato empírico, con sus propiedades concretas»¹³⁶.

3.2. Un balance revisitado: ¿una agenda investigadora *inconclusa*?

Pero de vuelta a los *resultados* de la “segunda ruptura”¹³⁷, en tanto las siguientes *rupturas*, ni la que ahora aspira a convertirse como la *tercera ruptura*, pueden ser consideradas

¹³⁵ VILAR, Pierre, *Historia marxista...*, *op.cit.*, p. 7. Más adelante el mismo autor destacaba lo que se ha terminado por convertir en uno de sus legados de mayor peso: «Se nos dirá que, en tales circunstancias, la historia es una extraña ‘ciencia’. Es cierto que se trata de una ciencia en vías de constitución. Pero *toda* ciencia está *siempre* en vías de de constitución. La noción de ‘horizonte epistemológico’ es útil, si sirve para distinguir las sucesivas adecuaciones de las construcciones del espíritu a las estructuras de lo real. El concepto de ‘ruptura epistemológica’ es peligroso si sugiere que se puede pasar bruscamente de la ‘no-ciencia’ a la ‘ciencia’, Marx lo sabía y por ello buscaba apasionadamente, en lo más lejano del pasado, los menores gérmenes de su propio descubrimiento. Y no subordinaba a sus propios descubrimientos la posibilidad de desarrollo científicos preparatorios o parciales». *Ibidem*, p. 9. Interesante también el trabajo de, MOSCOSO, Leopoldo, “¿En qué consiste pensar históricamente?” en SÁNCHEZ LEÓN, Pablo y IZQUIERDO MARTÍN, Jesús (eds.), *El fin de...*, *op.cit.*, pp. 2-36.

¹³⁶ THOMPSON, Edward P., “La lógica de la historia” en *Obra esencial Edward...*, *op.cit.*, p. 511 [texto procedente de, *id.*, *Miseria de la teoría...*, *op.cit.*]. Más adelante afirmaría: «El materialismo histórico difiere de otras ordenaciones interpretativas de los datos históricos no –o no necesariamente– por ninguna premisa epistemológica, sino por sus categorías, sus hipótesis características y procedimientos concomitantes y el declarado parentesco conceptual entre éstas y los conceptos elaborados por los cultivadores marxistas de otras disciplinas. Yo no veo la historiografía marxista como si fuera algo *subordinado* a algún corpus general de marxismo-como-teoría, situado en alguna parte (¿tal vez en la filosofía?). Al contrario, si hay un terreno común a todas las prácticas marxistas, debe estar allí donde el propio Marx lo situó, el materialismo histórico. Tal es el terreno del que brota toda la teoría marxista y al que debe retornar en definitiva». *Ibidem*, p. 517 [*cursiva* en el texto original].

¹³⁷ Téngase aquí presente la valoración de uno de los impulsores de la ‘segunda ruptura’ –término habitualmente empleado aunque probablemente poco acertado– Manuel Pérez Ledesma, quien ha efectuado tres observaciones sobre la misma a modo de *egohistoria*: «Es muy dudoso, para empezar, que el tan mentado artículo sobre ‘la segunda ruptura’ diera origen a una nueva fase en la historiografía obrera: de hecho, lo que recibió fueron sobre todo críticas como podrá comprobar quien revise las publicaciones de las dos décadas siguientes [...]. Es verdad que con el tiempo la cita de aquel texto pasó a convertirse en un lugar común; pero quienes han dedicado su investigación a la cultura obrera, se han ocupado de la cultura en el sentido más clásico del término [...] y no de su papel de intermediaria entre la esfera socioeconómica y los sujetos. No sólo es difícil justificar la aparición de una nueva fase a partir del citado texto. Además, y es mi segunda observación, tampoco era eso lo que se pretendía con el artículo:

como tales –por el momento– cabe añadir, más allá de las reacciones favorables o adversas que le acompañaron¹³⁸, que este mismo *fenómeno académico* iría perdiendo fuerza y consistencia a lo largo del tiempo¹³⁹.

Así pues, junto con otras cuestiones subyacentes y algún que otro debate entrecruzado, no sería gratuito, por ejemplo, que en el número 69 de 2011 de la revista *Historia Social* se publicará un dossier monográfico titulado, “De la historia cultural a la historia social” con artículos de William Hamilton Sewell¹⁴⁰, Gabrielle Spiegel¹⁴¹, M. Goswami¹⁴² o Geoff Eley¹⁴³. Un par de décadas antes la historiadora australiana Verity Burgann, concretamente a principios de los noventa, titulaba un artículo de la siguiente forma: “The strange death of labour history”, que bien se podía traducir como “La extraña muerte de la historia obrera”¹⁴⁴. Todo ello en una

más que la renovación de la historia obrera, lo que a sus autores nos empezaba a interesar, por razones tanto políticas como historiográficas, era el campo más amplio de la historia de los movimientos sociales, dentro de los cuales el movimiento obrero no había sido el más importante en todo el tiempo. Por eso, ni Álvarez Junco ni yo mismo hemos vuelto con mucha asiduidad a esa parcela específica de la historia social [...]. Alguna vez, de todas formas, sí lo hemos hecho. Una de esas vueltas, en lo que a mí se refiere, corresponde a un trabajo sobre la formación de la clase obrera en España, que ha sido mencionado por los defensores de la historia postsocial como ejemplo de tal historia sociocultural [PÉREZ LEDESMA, Manuel, “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en CRUZ, Rafael y id. (eds.), *Cultura y movilización...*, *op.cit.*]. Pues bien, y esta mi tercera observación, la tesis que allí se mantiene está en las antípodas de la doctrina que se atribuye, como ya hemos visto, a esa actitud historiográfica». PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*, pp. 245-246. Una última revisión de este mismo autor en, id., “The Formation of the Working Class: A Cultural Creation” en PIQUERAS, Juan Antonio y SANZ, Vicent (eds.), *A social history of Spanish Labour: new perspectives on class, politics and gender*, New York, Berghahn Books, 2007, pp. 19-42.

¹³⁸ Muy significativo en este sentido fueron las aportaciones recogidas en el célebre dossier de la revista *Debats* [nº 2/3, (1982), pp. 89-136], dedicado a los *Movimientos Sociales*, y coordinado por Javier Paniagua. Véase aquí también, “20 años del Encuentro de Barx”, *Historia Social*, nº 34, (1999), pp. 157-160. Así como las reflexiones posteriores al respecto de, PIQUERAS, José Antonio, “La práctica editorial de *Historia Social*”, *Revista del Centro de Investigaciones Históricas*, nº 12-13, (2001), pp. 93-108; y en menor medida de, FORCADELL, Carlos, “Sobre desiertos y..., *op.cit.*, p. 109.

¹³⁹ Junto con todo lo ya señalado, un balance clásico al respecto en, BARRIO ALONSO, Ángeles, “A propósito de la historia social, del movimiento obrero y los sindicatos” en RUEDA, Germán (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, Universidad de Cantabria, 1991, pp. 295-314. Y más recientemente el también citado de, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «extraña» derrota..., *op.cit.*”

¹⁴⁰ SEWELL, William H, “Líneas torcidas” en *De la historia cultural a la historia social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 69, (2011), pp. 93-106.

¹⁴¹ SPIEGEL, Gabrielle M., “Comentarios sobre una línea torcida” en *De la historia...*, *op.cit.*, pp. 107-118.

¹⁴² GOSWAMI, M., “Recordando el futuro” en *De la historia...*, *op.cit.*, pp. 107-118.

¹⁴³ ELEY, Geoff, “El mundo profano e imperfecto de la historiografía” en *De la historia...*, *op.cit.*, pp. 119-127.

¹⁴⁴ BURGANN, Verity, “The strange death of labour history” en CARR, B. [et al.], *Bede Fair and Labour history*, Sidney, Pluto Press, 1991, pp. 69-81. También Patrick Joyce caería en cierto pesimismo cuando a mediados de los noventa escribiría un artículo titulado, JOYCE, Patrick, “The end of social history?”, *Social History*, vol. XX, nº 1, (1995), pp. 73-91 [“¿El final de la historia social?” en *Ficción, verdad, historia*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 50, (2004), pp. 25-45], que comenzaba advirtiéndolo: «Los historiadores tienen en cierta medida razón al sospechar de los conceptos de ‘modernidad’ y ‘posmodernidad’». Como recuerda el autor: «El signo de interrogación al final del artículo parece que fue obviado entonces por muchos, que sólo vieron en el artículo una crítica decida de las formas entonces dominantes de historia social y una afirmación igual de decidida del ‘giro cultural’, cuando también era una llamada del concepto de lo social y un apunte de las nuevas posibilidades que puede aportar la historia social». JOYCE, Patrick, “Lo social en la historia social” en *¿Qué entendemos*

línea interpretación, en donde se constataba lo que parecía una realidad cada vez más unilateral: el fin de la historia del movimiento obrero. Lo más significativo sería que la propia autor sólo años después publicaría un nuevo texto ahora con el título: “The revival of labour history”¹⁴⁵. Un documento en donde reconocía la capacidad de renovación pero sobre todo de atracción, que seguía conservando la historiografía obrerista así como se daban por *rectificadas* sus anteriores hipótesis de trabajo. El objeto de traer estos dos casos aquí expuestos, reside en presentar ejemplos concretos que muestran la existencia de *voces disidentes*, en relación al manido como monótono relato mayoritario, por donde han transcurrido los principales episodios de cambios desde esta historiografía de lo social

Un último apunte. En este sentido, significativo también sería la publicación, *The future of the class in history: what's left of the social?* por Geoff Eley y Keith Nield¹⁴⁶, quienes en un intento por *restituir y dignificar* el concepto de la clase social por la senda historiográfica, han tratado de lograr la cuadratura del círculo: por un lado, han querido “re-materializar” la historia social, al mismo tiempo, que conceder “audiencia” a las teorías posmodernas. Una propuesta teórica que ha recibido no pocas críticas, ante las propias contradicciones internas contenidas en su misma formulación¹⁴⁷. No obstante, cabe añadir que la obra de Eley y Nield constituye uno

hoy..., *op.cit.*, p. 155. Del mismo historiador, id. (ed.), *The Social in Question: New Bearings in History and the Social Sciences*, London, Routledge, 2003.

¹⁴⁵ BURGANN, Verity, “The revival of labour history” en SHANAHAN, R. y SHANAHAN, M. (eds.), *Australian labour history reconsidered*, Adelaida, Austrial Humanities, 1999, pp. 240-244. Tanto esta como la anterior cita bibliográfica están tomadas prestadas de, LINDEN, Marcel van der, “La «globalización» de la historia del trabajo y de la clase obrera y sus consecuencias” en SANZ, Vicent y PIQUERAS, José Antonio (eds.), *En el nombre..., op.cit.*, p. 348, *nota 15*. El propio historiador matizaba algunas cuestiones sobre la siempre mencionada *crisis* de la historia social. De hecho, según su opinión, la misma debía circunscribirse a los países de la *región del Atlántico Norte*, coincidiendo en el tiempo con la crisis económica de los años setenta y la transición al nuevo modelo económico de acumulación capitalista. El contrapunto a esta situación sería la *historiografía obrerista* desarrollada en regiones concretas de Sudamérica, África y Asia, a lo largo de los años ochenta y noventa, caracterizada por una *gran cantidad de publicaciones e iniciativas institucionales* en este mismo ámbito. La conclusión *optimista* del profesor quedaba resumida al afirmar: «Estos ejemplos demuestran de manera amplia que la historia obrera y de la clase trabajadora, se ha convertido gradualmente en temas de investigación en todo el mundo. Soy, por lo tanto, de la opinión que no se puede hablar realmente de una ‘crisis’ en nuestra disciplina, si no que hay que diferenciar entre los diferentes continentes y subcontinentes». *Ibidem*, pp. 345-346. Del citado historiador véase su imprescindible trabajo, id., *Workers of the world: essays toward a global labor history*, Leiden / Boston, Brill, 2008.

¹⁴⁶ ELEY, Geoff y NIELD, Keith, *The future of..., op.cit.*. De los mismos autores, id. y id., “Volver a empezar: el presente, lo postmoderno y el momento de la historia social” en *Ficción, verdad, historia..., op.cit.*, pp. 47-58; y, asimismo, del propio Eley uno de sus libros más *polémicos* se pueden encontrar en: ELEY, Geoff, *Una línea torcida: de la historia cultural a la historia de la sociedad*, Valencia, Universitat de València, 2008. Asimismo, otros dos ejemplos de llamadas al *diálogo* –con mayor o menor éxito– en, SEWELL, William, *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*, Chicago, University of Chicago Press, 2003, y dentro de ahí, “The Political Unconscious of Social and Cultural History, or, Confessions of a Former Quantitative Historian” (pp. 22-80); y, en menor medida, la citada de, BONELL, Victoria y HUNT, Lynn (eds.), *Beyond the Cultural..., op.cit.*. Por lo demás, consúltese también aquí: REID, Donald, “Reflections on Labor History and Language” en BERLANSTEIN, Lenard R. (ed.), *Rethinking Labor History..., op.cit.*, pp. 39-54. E igualmente, la mayor parte de los trabajos contenidos en, PASTURE, Patrick, VERBERCKMOES, Johan y DE WITTE, Hans (eds.), *The Lost Perspective? Trade Unions Between Ideology and Social Action in the New Europe*, II vols., Aldershot, Brookfield / Avebury, 1996.

¹⁴⁷ «Cuando autores como Eley y Nield aluden a la ‘miopía del materialismo’, cuando ‘clase’ se escribe con comillas irónicas y cuando se lamentan de un ‘análisis de clase al viejo estilo’ pasado de moda, su llamada al acercamiento parece ofrecer una bienvenida más cálida a aquellos con un bagaje posmodernista que a los que viajan con equipaje marxista. Su intento de reinsertar las cuestiones de clase y estructura social en el centro de la historia social es más que bien recibido en estos momento pero puede que el desacuerdo ideológico siga siendo una característica (no siempre negativa) de la historia social que

de los más serios intentos de revisión y actualización y que, por tanto, más allá de las opiniones y valoraciones que puedan surgir de su lectura, es hoy día una de las referencias centrales. Todavía más, nos atreveríamos a afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que en *El futuro de la clase en la historia* se encuentran contenidas no pocas *pistas* para salir de no pocos atolladeros teóricos que han impedido, normalmente, debates más fructíferos dentro de la historiografía de lo social.

A pesar de todo lo que se ha escrito –en algunos casos con claras muestras de temeridad– la historiografía obrerista clásica ha seguido manteniendo su público. Igualmente el *impulso culturalista* renovador que no ha encontrado en la práctica obstáculo ninguno en su desarrollo –abiertas les han estado las puertas de la mayor parte de los departamentos de historia y de los consejos de redacción de las principales revistas científicas del país– no ha terminado tampoco por asentarse en sus objetivos ni en sus métodos, como lo demuestra la inexistencia de una línea de investigación definida o de una escuela historiográfica propia.

De esta forma, la historia social en torno al movimiento obrero –a pesar de su “mala prensa” y el hipercriticismo a la que ha estado sometida¹⁴⁸– ha resistido, por tanto, el paso de la crisis mejor de lo que normalmente se ha venido aceptando. Esta *extraña derrota del movimiento obrero*, como la hemos calificado en más de una ocasión, ha mostrado ante todo,

«un ámbito de estudio que desprovisto desde hace mucho tiempo de la *vigilancia* que recababa en los medios académicos, de una manera más cíclica y continuada de lo que se ha estimado habitualmente, viene una y otra vez a la primera línea de nuestra historiografía social. Historia del movimiento obrero en sus términos más clásicos, que renovada teórica, conceptualmente y con un aparato crítico sometido a una interminable revisión, ha aportado, junto con la historiografía sobre la Guerra Civil y la represión franquista, ingentes cantidades de monografías y artículos científicos, como pocos temas históricos»¹⁴⁹.

En el año 2007 presentábamos los resultados de una larga investigación, que titulamos: *La historia de las clases trabajadoras: datos para un balance*¹⁵⁰. En aquella ocasión, nos preguntábamos por dos grandes cuestiones: primero, por los tan *anunciados* resultados de la “segunda ruptura” en el terreno de la investigación; y segundo, por cómo había *resistido* la historia social clásica del movimiento obrero las continuadas críticas en relación a su objeto de estudio. Para ello nos propusimos realizar un vaciado bibliográfico de tesis doctorales, monografías, comunicaciones presentadas a los más importantes congresos y artículos científicos desde mediados de los años setenta, en relación a un tema específico que nos era y sigue siendo de interés: los trabajos de historia social –sin más adjetivos ni especificaciones– sobre el movimiento obrero durante el franquismo y la transición a la democracia. A pesar del

no cambiará por mucho diálogo que haya». SANGSTER, Joan, “Historia Social” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, p. 219. Véase asimismo, KIRK, Neville, “La formación de la clase obrera. En defensa de la clase. Crítica a algunas aportaciones revisionistas sobre la clase obrera inglesa en el siglo XIX”, *Historia Social*, nº 12, (1992), pp. 59-100. Por último, nos remitimos a la *Presentación*, *nota 183*, *nota 184* y *nota 185*.

¹⁴⁸ URÍA, Jorge, “Sociología e historia...”, *op.cit.*, p. 165.

¹⁴⁹ GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*, p. 109.

¹⁵⁰ *Ibidem*. Más tarde el citado estado de la cuestión se actualizaría en: id., “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*. Y, desde otra perspectiva, BUENO LLUCH, Manuel y id., “Por una historia social del comunismo. Notas de aproximación” en id. y id. (eds.), *«Nosotros los...»*, *op.cit.*. Por otro lado, consúltese también el documentado trabajo al respecto de, RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar J., “La historia local y social del franquismo en la democracia, 1976-2003. Datos para una reflexión”, *Historia Social*, nº 56, (2006), pp. 153-177; y unos años antes, CRUZ RUBIO, M^a y RUIZ FRANCO, M^a Rosario, “La investigación histórica sobre el franquismo: un análisis bibliométrico de las revistas españolas (1976-1992)”, *Hispania*, vol. LIV, nº 187, (1994), pp. 661-676.

escaso tiempo en que se basa esta actualización y revisión –entre 2006/2007 a 2011/2012¹⁵¹– y que, a lo sumo, permite observar tendencias generales, el resultado es bastante similar al antes anunciado.

Sin embargo, e internándonos ya en este breve repaso bibliográfico, sí se pueden observar algunos cambios *significativos*. En primer lugar, en relación a las propias tesis doctorales. Por más que en la década de los noventa y el primer lustro del siglo nuevo, no se produjeran una ingente cantidad de investigaciones doctorales, año tras año, se leían en las universidades españolas más de una tesis sobre el movimiento obrero, la clase obrera, el mundo del trabajo, las relaciones laborales... o incluso sobre CCOO, UGT, el PCE o el propio PSOE. De hecho, desde la publicación de la tesis doctoral de Xavier Domènech en 2006 –*Pequeños grandes cambios. Movimiento obrero y cambio político*¹⁵²– se ha producido lo que bien se pudiera llamar –coloquialmente– un *parón*. Todo ello, a excepción de la tesis del propio Jesús de Felipe, *Orígenes y formación del movimiento obrero en España: una revisión histórica e historiográfica* en el año 2009¹⁵³.

Situación que contrasta con una considerable –teniendo siempre en cuenta de donde se parte– publicación de monografías y obras colectivas, que han venido a abordar no pocas cuestiones pendientes, así como se caracterizan, además de por una creciente pluralidad temática, por un enriquecimiento de enfoques y perspectivas investigadoras. Desde la publicación de la tesis doctoral del propio Domènech –*Clase obrera, antifranquismo y cambio político*¹⁵⁴– o su más reciente aportación en, *Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo (1939-1977)*¹⁵⁵, a obras como las de Andrea Tappi, *SEAT, modelo para armar: fordismo y franquismo (1950-1980)*¹⁵⁶, bien se puede hacer constar un interés que permanece en el tiempo. En este sentido, también han de reseñarse obras que, en adelante, se han convertido rápidamente en referencias obligadas. Por ejemplo, la obra colectiva de José Gómez Alén y Rubén Vega, *Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista*¹⁵⁷, el estudio colectivo coordinado por José Babiano, *Del hogar a la huelga: trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo*¹⁵⁸, las actas de un importante Seminario Internacional editadas por Javier Tébar Hurtado, *El movimiento obrero en la gran ciudad*¹⁵⁹, o el también trabajo colectivo de

¹⁵¹ En concreto, entre los meses de marzo y abril de 2012.

¹⁵² DOMÈNECH, Xavier, *Pequeños grandes cambios. Movimiento obrero y cambio político en la década de los sesenta*, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2006.

¹⁵³ FELIPE, Jesús de, *Orígenes y formación del movimiento obrero en España. Una revisión histórica e historiográfica*, Tesis Doctoral, Universidad La Laguna, 2009.

¹⁵⁴ DOMÈNECH, Xavier, *Clase obrera, antifranquismo...*, *op.cit.*.

¹⁵⁵ Id., *Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977)*, Barcelona, Icaria, 2012.

¹⁵⁶ TAPPI, Andrea, *SEAT, modelo para armar: fordismo y franquismo (1950-1980)*, València, Germania, 2010 [*Un'impresa italiana nella Spagna di Franco: il rapporto Fiat-SEAT dal 1950 al 1980*, Perugia, Crace, 2008].

¹⁵⁷ GÓMEZ ALÉN, José y VEGA, Rubén (coords.), *Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista (Vol. I)*, Madrid, Fundación de Abogados de Atocha de CCOO de Madrid / Ediciones GPS, 2010. Dentro de este amplio libro colectivo véase el estado de la cuestión de, CABRERO, Claudia, DÍAZ, Irene y GORDON, Carlos, “Fuentes para el estudio de la abogacía antifranquista” (pp. 332-356).

¹⁵⁸ BABIANO, José (ed.), *Del hogar a la huelga: trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007. En concreto, véase, MUÑOZ RUIZ, M^a del Carmen, “Género: masculinidad y nuevo movimiento obrero bajo el franquismo” (pp. 245-285).

¹⁵⁹ TÉBAR, Javier (ed.), *El movimiento obrero en la gran ciudad. De la movilización sociopolítica a la crisis económica*, Barcelona, El Viejo Topo, 2011. Un volumen colectivo con no pocos trabajos, a destacar el de, YSÀS, Pere, “Movilización y desmovilización obrera. Del franquismo a la democracia” (pp. 273-297).

Salvador Cruz Artacho y Julio Ponce Alberca, *El mundo del trabajo en la conquista de las libertades*¹⁶⁰, el dirigido por Sergio Gálvez, *Delincuentes Políticos*¹⁶¹ o la reciente edición de la obra colectiva de Rubén Vega, *Las Huelgas de 1962*¹⁶².

Por lo demás, en la citada investigación de 2007, igualmente, llevamos a cabo un *vaciado bibliográfico* de veintidós revistas de historia y treinta y tres de ciencias sociales principalmente¹⁶³. En esta ocasión, se han tenido presente otras cuatro revistas de historia contemporánea¹⁶⁴. Decíamos en aquella ocasión que los artículos sobre el movimiento obrero, “se convertían en las excepciones que confirman la regla”, en relación a su muy escasa presencia. Así sigue siendo, sin ambigüedades de ningún tipo, desde una panorámica global cuando se revisa lo producido en décadas anteriores. No sólo es que no se hayan publicado *dossier monográficos* o que los escasos textos publicados (no teóricos) hayan suscitado mayor atención: es que, simplemente, son una ínfima minoría. *Minoría* frente a las nuevas temáticas de historia social de carácter cultural.

Con todo, o mejor dicho *pese a todo*, a través de las revistas científicas se van dando a conocer nuevas líneas de investigación, pero sobre todo salen a la “superficie” una pequeña nómina de nuevos historiadores sociales dedicados al movimiento obrero. Pero también se ha de verificar como cada vez son menos las revistas que dedican atención alguna a este aspecto. De esta forma, junto con revistas consolidadas como *Espacio, Tiempo y Forma*¹⁶⁵, *Ayer*¹⁶⁶, *Historia Actual Online*¹⁶⁷, *Sociología del Trabajo*¹⁶⁸ –aunque aquí las contribuciones no procedan del

¹⁶⁰ CRUZ ARTACHO, Salvador y PONCE ALBERCA, Julio (coords.), *El mundo del trabajo en la conquista de las libertades*, Jaén, Publicaciones de la Universidad de Jaén, 2011. Ahí mismo véase el trabajo de uno de los coordinadores: CRUZ ARTACHO, Salvador, “El mundo del trabajo y la conquista de la democracia. Otra mirada posible a la historia de la Transición Política” (pp. 37-52).

¹⁶¹ GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*. Junto con los ya mencionados trabajos destacados en dicho volumen, también, id., “Delincuentes políticos: biografía de una «generación de militantes antifranquistas»” (pp. 542-613); DOMÈNECH, Xavier, “Puntos de fuga. La historia del movimiento obrero y el tardofranquismo”.

¹⁶² VEGA, Rubén, (coord.), *Las huelgas de 1962: hay una luz en Asturias*, Oviedo, Ediciones Trea / Fundación Juan Muñoz Zapico, 2012 [2ª ed., 2002]. Y asimismo la ya citadas varias veces, id., *La reconstrucción del...*, *op.cit.*.

¹⁶³ El listado de las mismas puede encontrarse en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*.

¹⁶⁴ *Revista Historia Actual, Sigle XX: Revista Catalana d’Història, y Historia, Trabajo y Sociedad y Historia Actual Online.*

¹⁶⁵ GONZÁLEZ de ANDRÉS, Enrique, “La lucha contra el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo de Sagunto (Valencia)”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, nº 23, (2011), pp. 200-220.

¹⁶⁶ DOMÈNECH, Xavier, “La formación de la clase obrera bajo el franquismo. Nuevos debates”, *Ayer*, nº 79, (2010), p. 283-296; id., “La clase obrera bajo el franquismo. Aproximación a sus elementos”, *Ayer*, nº 85, (2012), pp. 201-225.

¹⁶⁷ ORTIZ HERAS, Manuel, CASTELLANOS LÓPEZ, José Antonio y MARTÍN GARCÍA, Oscar, “Historia social y política para una transición. El cambio desde abajo y la construcción de una autonomía: Castilla-La Mancha”, *Historia Actual Online*, nº 14, (2007), pp. 115-126.

¹⁶⁸ GARCÍA CALAVÍA, Miguel Ángel, “Conflicto laboral y protesta obrera en el tardofranquismo. El caso de la Unión Naval de Levante”, *Sociología del Trabajo*, nº 62, (2008), pp. 120-145; MAIRA VIDAL, Mª del Mar, “El paternalismo industrial en el régimen franquista: la colonia industrial Ciudad Pegaso en Madrid”, *Sociología del Trabajo*, nº 65, (2009), pp. 137-162; BODI ROMIRO, Julio, “¿Y ahora qué? Patrimonio, identidad y trabajo a 26 años de la reconversión industrial en el Puerto de Sagunto”, *Sociología del Trabajo*, nº 71, (2011), pp. 100-177.

campo estrictamente historiográfico— y claro está, *Historia Social*¹⁶⁹, en este tiempo la mayor parte de las contribuciones se han publicado en *Historia del Presente*¹⁷⁰, *Segle XX: Revista Catalana d'Història*¹⁷¹ e *Historia, Trabajo y Sociedad*¹⁷².

Un estado de la cuestión también extrapolable en relación a las comunicaciones —y en menor medida a las ponencias— presentadas a los más importantes congresos científicos de la profesión. De entrada, realizar dos observaciones ya detectadas en otros ámbitos: primero, la falta de encuentros especializados para una historia social interesada específicamente en el movimiento obrero, con contadas excepciones¹⁷³; y segundo, la capacidad de la *cultura* —en su más amplio sentido— de absorberlo todo. Un solo ejemplo es suficiente: cuando se revisan los títulos de los paneles de los congresos científicos celebrados en estos años, se ha omitido palabras como *conflicto* por *protesta*, *clase* por *identidad*, *relaciones capital-trabajo* por *mundo de trabajo* o en su defecto *relaciones laborales*... Términos todos ellos más acordes con los *nuevos tiempos* y por extensión con menor carga político-ideológica. He aquí otro ejemplo del *progreso* de la disciplina, aunque cuesta discernir si el mismo puede llegar a guardar relación con las “tesis” post-sociales.

En los años en que nos movemos, tuvieron lugar el noveno y el décimo congresos de la Asociación de Historia Contemporánea. Nos detendremos solamente en las comunicaciones allí presentadas. En el IX Congreso titulado *Ayeres en discusión* y celebrado en Murcia en 2008, de los cinco bloques presentados, en el “Bloque 4. La sociedad en sus conflictos. Fuentes y relatos historiográficos”, tendrían cabida de forma no directa trabajos de historia social¹⁷⁴. De las decenas de comunicaciones, tan sólo tres —en concreto la de Carlos Carnicero¹⁷⁵, Rubén Vega¹⁷⁶

¹⁶⁹ MOLINERO, Carme, “Nuevas formas de sindicalismo en un tiempo de contestación: CGIL y CCOO, 1966-1976” en *Asociacionismos, conflicto y representatividad*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 72, (2012), pp. 133-153.

¹⁷⁰ YSÀS, Pere, “La imposible «paz social»: el movimiento obrero y la dictadura” en *Dictadura y antifranquismo*. Dossier monográfico, *Historia del Presente*, nº 9, (2007), pp. 7-26; o, ARAYA GOMÉZ, Rodrigo, “Asegurar el pan y la libertad: la postura de Comisiones Obreras ante el Pacto de la Moncloa”, *Historia del Presente*, nº 14, (2009), pp. 151-164.

¹⁷¹ En el nº 3, (2010) plantearía el abierto debate sobre las relaciones entre la historia urbana y la historia social obrera: OYÓN, José Luis, “Història urbana com a història obrera: algunes reflexions sobre *La quiebra de la ciudad popular*” (pp. 149-163); ROCA, Francesc, “L’exit del model urbà català” (pp. 165-178); OYÓN, José Luis, “Una ciutat desigual” (179-191). Por lo demás, obras de referencia centrales en: KATZNELSON, Ira, *Marxism and city*, Oxford, Oxford University Press, 1982; RODGER, Richard (ed.), *European urban History. Prospect and Retrospect*, Leicester, Leicester University Press, 1993; y PINOL, Jean-Luc, *Histoire de l’Europe Urbaine*, vol. II, *de l’Ancien Régime à nos jours*, Paris, Seuil, 2003.

¹⁷² Por ejemplo, en su nº 1, (2010), se publicarían, entre otros, los siguientes textos: HEBENSTREIT, Mª, “Conflicto y cultura de negociación en Altos Hornos de Sagunto, 1959-1975” (pp. 7-28); o, MOTA MUÑOZ, José Fernando, “La huelga de los 21 días de 1977: conflictividad en la construcción de Barcelona durante la transición” (pp. 29-52).

¹⁷³ Nos referimos, por ejemplo, a la celebración del Seminario de Investigación, “El movimiento obrero asturiano bajo la represión franquista”, celebrado en la Universidad Laboral de Gijón, en mayo de 2011, y que organizado por la Fundación Juan Muñiz Zapico reuniría a los principales especialistas aquí señalados.

¹⁷⁴ NICOLÁS MARÍN, Encarna y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (eds.), *Mundos de ayer: investigaciones históricas contemporáneas al IX Congreso de la AHC [9º. 2008. Murcia]*, Murcia, Editum, 2009. Las comunicaciones serían recogidas en: id. y id. (eds.), *Ayeres en discusión: temas claves de la historia contemporánea hoy [IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Murcia, 17, 18 y 19 de septiembre de 2008]*, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2008 [CD-ROM].

¹⁷⁵ CARNICERO, Carlos, “De la calma a la revolución: aproximación a la conflictividad laboral en Álava en los últimos años del Franquismo (1970-1976)”. Del mismo autor, id., *La ciudad donde nunca*

y Enrique Berzal de la Rosa¹⁷⁷ – trataron sobre aspectos relacionados con el movimiento obrero. Otro tanto sucedería en el X Congreso desarrollado en Santander en 2010 y que bajo el título, *Nuevos horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación* en las quince mesas constituidas no más de una comunicación –de nuevo a modo de *excepción que confirma la regla*– estaría centrada en el asunto que nos trae aquí¹⁷⁸.

Si fijamos ahora nuestra atención en lo sucedido en el sexto y séptimo encuentros de *investigadores del franquismo*, el resultado vuelve a ser parejo. Pese a lo concreto del tiempo histórico, la disposición de mesas especificadas en torno al mundo del trabajo y el hecho de estar organizados por la Red de Archivos de CCOO, se constata todo lo anterior. Así en el VI Encuentro de Investigadores de Franquismo celebrado en Zaragoza en 2006, solamente una comunicación, bajo los aquí criterios seguidos, se presentarían a la cuarta sesión “El mundo del trabajo: obreros, empresarios y estado”. En concreto, la de Nàdia Varo, “Conflicto laboral y militancia antifranquista. Las trabajadoras del área de Barcelona entre los años cuarenta y sesenta”¹⁷⁹. En el siguiente encuentro de Santiago de Compostela en 2009 en la primera sesión también dedicada al “Mundo del Trabajo” apenas se leerían dos comunicaciones: “El movimiento obrero en Puerto de Sagunto desde 1958 hasta el fin del régimen franquista” de María Hebenstreit, y “Trabajadores sometidas: Retos y enfrentamientos laborales de las mujeres vallisoletanas durante el franquismo” de María Silva López Gallegos¹⁸⁰. Aportaciones en ambos congresos fruto de investigaciones doctorales en marcha –en la mayor parte de los casos– y de carácter local.

Como saludable *novedad* en este último lustro se han organizado tres encuentros de *jóvenes investigadores en Historia Contemporánea*. En cada ocasión, decenas de decenas de jóvenes historiadores de todas las universidades del país se reunieron de forma bianual. Y a tenor de las comunicaciones allí presentadas, no cabría inferir muchas esperanzas de encontrar *cantera juvenil* en relación a la historia social del movimiento obrero. Por ejemplo, en el I Encuentro de Zaragoza en 2007, pese dedicarse a una mesa a “Historia Social: protesta, relaciones en el mundo del trabajo”, ninguna comunicación específicamente *obrerista* se

pasa nada: Vitoria, 3 de marzo de 1976, 2ª ed., Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2009.

¹⁷⁶ VEGA, Rubén, “De la dinamita a la huelga del silencio: los mineros asturianos entre la revolución proletaria y la resistencia antifranquista (1934-1962)”.

¹⁷⁷ BERZAL de la ROSA, Enrique, “¿Un movimiento obrero controlado por el clero?”.

¹⁷⁸ Las actas pueden consultarse en, BARRIO ALONSO, Ángeles, HOYOS PUENTE, Jorge de, SAAVEDRA ARIAS, Rebeca (eds.), *Nuevos horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación*, Santander, Universidad de Cantabria, 2011. La comunicación a la que nos referimos es la de, GONZÁLEZ de ANDRÉS, Enrique, “Las huelgas de enero de 1976 en Madrid. Un pulso al sistema”, incluida en la “Mesa 9. La democracia en las culturas políticas del siglo XX: participación, acción política, prácticas políticas, aspectos comparativos”. Igualmente ha de señalarse: GÓMEZ FERNÁNDEZ, Ana Belén, “Entre la precariedad y la invisibilidad: el trabajo femenino en Jaén en el tardofranquismo”.

¹⁷⁹ CARRERAS, Juan José [Comité Organizador] [et al.], *VI Encuentro de Investigadores del Franquismo: Zaragoza 15, 16 y 17 de noviembre de 2006* [6º, 2009, Zaragoza], Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura, 2009. VARO MORAL, Nàdia, “Conflicto laboral y militancia antifranquista. Las trabajadoras del área de Barcelona entre los años cuarenta y sesenta”. A tener también presente el trabajo de, TAPPI, Andrea, “Fotografía y representación de la fábrica. Imágenes de SEAT durante el franquismo”.

¹⁸⁰ CABANA IGLESIA, Ana, LANERO TÁBOAS Daniel y SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor Manuel (eds.), *VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo* [7º, 2009, Santiago de Compostela], Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo, 2010 [CD-ROM]. HEBENSTREIT, Mª, “El movimiento obrero en Puerto de Sagunto desde 1958 hasta el fin del régimen franquista”; LÓPEZ GALLEGOS, Mª Silva, “Trabajadoras sometidas: Retos y enfrentamientos laborales de las mujeres vallisoletanas durante el franquismo”.

presentaría, predominando contribuciones –de notable calidad– acerca del papel de los movimientos sociales¹⁸¹. En el II Encuentro que tendría lugar en Granada en 2009 en la mesa dedicada de igual título tan sólo la comunicación de Rodrigo Araya Gómez –“«Quebrando la herencia del franquismo». Respuestas sindicales ante los Pactos de la Moncloa”– podría encuadrarse desde nuestra perspectiva¹⁸². Ya en el III Encuentro del año 2011 en Vitoria, y rebajado el título de la *mesa* a sencillamente, “Historia Social”, la *historia* se volvía a repetir: no más de dos comunicaciones. Primero la de Gema Suárez Menéndez, “Las doctrinas de ENSIDESA. Lecturas sobre el paternalismo industrial a través de la revista de empresa”, y segundo, la de, Marta Mauri Medrano, “Los movimientos obreros católicos bajo el franquismo. ¿Una oposición tolerada?”¹⁸³.

A nivel cuantitativo –en tanto a nivel cualitativo el balance difiere– esta actualización del estado de la cuestión, es del todo reveladora de la escasa presencia de una posible historia social del movimiento obrero, sin más especificaciones. Dicho esto, ¿estamos ante los *restos del naufragio*? ¿Los últimos *irredentos* de la “causa”? No creemos que así pueda hablarse al respecto. Más bien, estamos ante la combinación de una línea de investigación que *resiste* pero no desaparece en relación a las nuevas investigaciones; y de *consolidación* por parte de *nuevos* y *viejos* investigadores. De cualquier forma, se trata de un campo minoritario frente a los consensos historiográficos hegemónicos. ¿Aislada? Quizás, con el añadido de que ayuda poco en esa siempre *buscada* promoción académica¹⁸⁴. ¿Optimismo? El justo y sin exageraciones. En verdad, lo único cierto es que la tan denostada como crítica *historia clásica obrerista* es ya un pasado superado. Una afirmación, por lo demás, obvia y consabida.

Téngase presente, sin embargo, que lo dicho hasta aquí no significa que la historia sociocultural haya ocupado plenamente el campo de la historia social clásica. Las posibles causas en torno a tal cuestión sobrepasan con mucho este posible estado de la cuestión. Así pues, lo que se está afirmando, por el contrario, es otra *pequeña* evidencia, quizás, menos perceptible a primera vista. Nos explicamos. Lo que ha ocurrido a nivel general, en buena medida, ha sido un alejamiento progresivo de la historiografía, o mejor dicho de las prácticas e investigaciones históricas, de la historia social clásica, sociocultural o como quiera que se le adjetive. A partir de ahí, y pese a lo que se expondrá a continuación en relación a las *nuevas perspectivas y debates* dentro de la historiografía obrerista, el desplazamiento hacia nuevos pero

¹⁸¹ ALDUNATE, Oscar y HEREDIA, Iván (coords.), *I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC* [1º, 2007, Zaragoza], Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2008.

¹⁸² FUENTES NAVARRO, Mª Candelaria, CONTRERAS BECERRA, Javier y LÓPEZ CHAVES, Pablo (eds.), *II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea* [2º, 2009, Granada], Granada, Editorial Universidad de Granada, 2010 [CD-ROM]. ARAYA GÓMEZ, Rodrigo, “«Quebrando la herencia del franquismo». Respuestas sindicales ante lo Pactos de la Moncloa”. Agradecemos a Carlos Fuertes Muñoz el acceso a las comunicaciones.

¹⁸³ A la espera de la publicación de las actas del “III Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Historia Contemporánea (AHC)”, véase: jovenesinvestigadores2011.blogspot.com.es. SUÁREZ MÉNDEZ, Gema, “Las doctrinas de ENSIDESA. Lecturas sobre el paternalismo industrial a través de la revista de empresa”; MAURI MEDRANO, Marta, “Los movimientos obreros católicos bajo el franquismo. ¿Una oposición tolerada?”. Agradecemos al coordinador del citado encuentro, Jon Penche, el acceso a las comunicaciones.

¹⁸⁴ A ello se suma lo que en su momento Xavier Domènech criticó duramente –por cierto, en línea con el planteo de Piqueras ya visto [nota 99]–: «Si tomamos en cuenta la financiación de líneas de investigación, el centro del ojo público o los intereses editoriales, indudablemente lo es [fin de la centralidad de la historiografía del movimiento obrero durante el franquismo]. Y eso no es poco: significa la marginación práctica de una de las principales líneas de renovación de la historia social del franquismo y de la historia de este período *tout court*. Es evidente que todo ello afecta, y no poco, a la práctica y a la posibilidad investigadora y, a pesar de ello, es sorprendente la cantidad de investigadores jóvenes que aún se dedican a este tema, otra cosa es que esa línea les permite consolidar sus trayectorias». DOMÈNECH, Xavier, “Puntos de fuga. La historia del movimiento obrero y el tardofranquismo” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos...*, op.cit., p. 9.

sobre todo viejos enfoques –empezando y casi terminando por la *historia política*– lo que viene a traducirse, en suma, es un desinterés cada vez más generalizado por lo social, independientemente –insistimos– del *enfoque* o *subespecialidad* elegida o defendida. Es, por tanto, a partir de este marco generalista en donde se puede y se debe visualizar cualquier balance global.

Por lo demás, esta parcial aproximación también nos permite afirmar la consolidación de dos generaciones activas implicadas en este mismo campo. Por un lado, las nacidas entre los años 50 y 60 –Rubén Vega, José Babiano o Javier Tébar– y las de los años 70 y 80 del siglo XX –junto Xavier Domènech, Andrea Tappi, María del Carmen Muñoz Ruiz, Nàdia Varo...–. Nos encontramos, pues, más ante un proceso de sucesión generacional antes que de renovación, con una consolidada nómina de historiadores. No deja de ser significativo, por otro lado, que buena parte de los considerados historiadores sociales de la primera generación –más allá de sus relevantes aportaciones teóricas– en estos últimos años no hayan realizado publicaciones en este mismo sentido, con escasas excepciones¹⁸⁵.

Ahora bien, es precisamente en el campo temático –más allá de una posible cuantificación al uso– en donde más y mayores progresos se han realizado. A través de un constante proceso de renovación han ido apareciendo nuevos interrogantes, acompañados de nuevas técnicas y metodologías. En gran medida, podríamos aseverar –siempre con este carácter de provisionalidad ya reclamado– que nos encontramos en una etapa ya distinta a las de los años ochenta y noventa. Una etapa esta última –los 90– en donde a juicio del propio Xavier Domènech –todo ello con un *tono* un tanto *exagerado*– nos encontraríamos con los “auténticos padres fundadores de la historiografía en este campo” y con el “gran salto dado” en relación a los interrogantes y la agenda investigadora¹⁸⁶.

Lo cierto –más allá de si está o no se está de acuerdo con las anteriores afirmaciones– es que se podría llegar a hablar de una *nueva etapa* en relación a esta última y entrecortada década. En gran medida, dado por superado el debate en torno al carácter político o no de las huelgas laborales bajo el franquismo, persiste –con notable fuerza– los interrogantes acerca del papel decisivo de las actuaciones del movimiento obrero y de la propia clase obrera en los resultados finales del proceso de transición. Pero junto con estas *viejas-nuevas* cuestiones y una vez completado un primer mapa geográfico de carácter regional y en ocasiones local, a poco que se

¹⁸⁵ Nos remitimos aquí a la bibliografía citada en la *nota* 150.

¹⁸⁶ DOMÈNECH, Xavier, “La formación de..., *op.cit.*, p. 284. Una valoración en la que coincidieron tanto PIQUERAS, José Antonio A. y SANZ, Vicent, “The social History..., *op.cit.*, p. 477 como PRESTON, Paul, “Recientes estudios de historia del movimiento obrero español”, *Sistema*, n° 106, (1993), pp. 109-144. El propio historiador británico tras advertir de las importantes contribuciones que se podía detectar, advertía en tono crítico no exento de ironía: «La reconstrucción detallada de los hechos de las organizaciones sindicales o de los procesos de toma de decisión de sus grupos dirigentes, ya no se considera una actividad que valga la pena». *Ibídem*, p. 109. Por lo demás, Domènech citaba en aquella ocasión las siguientes obras: BALFOUR, Sebastian, *La dictadura, los trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988)*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1994; BABIANO, José, *Emigrantes, cronómetros y huelgas: un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977)*, Madrid, Fundación 1° de Mayo / Siglo XXI, 1995; y, MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere, *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad en la España franquista*, Madrid, Siglo XXI, 1998. Mucho más crítico se mostraría uno de los *aludidos*. José Babiano, para quien estos nuevos intereses venían a suponer el *fin de la historia política* del movimiento obrero, que hasta entonces había predominado: «Sin embargo, básicamente en los últimos diez años, de forma paralela a esta suerte de Historia Política del movimiento obrero, viene cobrando cuerpo la preocupación por otra serie de problemas. Temas como las condiciones de vida y trabajo, redes de solidaridad, formas de acción colectiva o subculturas de clase, vienen configurando un repertorio diferente de objetos de estudio. Es decir, en lugar de la dinámica aislada de las organizaciones, se abordan facetas que constituyen la propia esfera de la sociedad. En este sentido se ha producido un giro en el estudio de la clase obrera hacia la Historia Social». BABIANO, José, *Emigrantes, cronómetros y...*, *op.cit.*, p. 1.

observe, ahora sí se ha dado un *pequeño-gran salto* adelante –medido en términos de madurez– en el mismo momento en que se fija la atención en las nuevas temáticas cada vez más presentes. *Temáticas*, que tienen en común una muy acentuada tendencia a la promiscuidad con la historia sociocultural y otros terrenos *afines*. Así, sin prácticamente, mayores conflictos ni contradicciones, la historia social (*clásica* o no) se ha interrogado por las *identidad* de la clase obrera, por la composición y heterogeneidad de la clase obrera con la integración de la perspectiva de la masiva inmigración, por la perspectiva de género pero también feminista con la inclusión de la *masculinidad*¹⁸⁷, por las *nuevas-viejas culturas militantes obreras* que se pueden rastrear a través de los principales nodos de socialización –fábrica, familia, barrio¹⁸⁸–, por los procesos de transmisión de memoria generacionales traumáticas, incluida aquí los efectos de la represión laboral bajo el franquismo¹⁸⁹, y a su vez, por los fenómenos asociados a la renovación, sucesión o ruptura generacional en el seno del movimiento obrero español. A saber, nos hallamos ante un mayor grado de especialización y por tanto de complejidad, sin que la *historia social* haya dejado de ser considerada *historia social del movimiento obrero*.

Y llega aquí, la pregunta de *rigor*: ¿nueva agenda investigadora de la historia social (*clásica*)? La pluralidad de experiencias e investigaciones invitan a pensar en una respuesta afirmativa, tal y como ya se detectó en la investigación del año 2007. En este escenario, que no puede catalogarse de crecimiento pero tampoco de estancamiento, sino de consolidación –insistimos una vez más– resulta más pertinente –que no impertinente– interrogarse si lo anterior, conduce a sí se puede hablar del *¿fin* de la *vieja agenda* de la historia social?

En este *ir y venir* se pueden observar fenómenos harto interesantes en esta sucesión interrelacionada de *viejas-nuevas inercias*, que, en suma, nos habla de un campo de investigación vivo. En relación a las *viejas inercias* es llamativo el reciente interés por el conflicto de los Altos Hornos de Sagunto durante la primera mitad de la década de los años ochenta¹⁹⁰. Más allá del libro de los economistas Miguel Ángel Sáez García y Pablo Díaz Morlán –*El puerto del acero*¹⁹¹– no pocos jóvenes investigadores –y no tan jóvenes y no sólo vinculados al campo de la historia– han venido publicando un conjunto de trabajos –lo que a nivel cuantitativo en este mismo terreno es ya una novedad– al respecto¹⁹². Una posible interpretación que se intuye –antes que afirmar y/o asegurar– sería que aquel (gran) conflicto constituiría, a la postre, el último gran ejemplo de *heroicidad* a la que se tienden a vincular la lucha del movimiento obrero en el último cuarto del siglo XX en España. De hecho, contiene

¹⁸⁷ En este sentido, determinante sería la publicación de, BORDERÍAS, Cristina, BORREL, Mónica, IBARZ, Jordi y VILLAR, Conchi, “Los eslabones perdidos del sindicalismo democrático” en PÉREZ PÉREZ, José Antonio (coord.), *Desarrollismo, dictadura y cambios sociales*. Dossier monográfico *Historia Contemporánea*, nº 26, (2003), pp. 161-206. E igualmente, de la obra de, MONJO, Anna, *Militants. Democràcia i participació a la CNT als anys trenta*, Barcelona, Laertes, 2003.

¹⁸⁸ Aunque más adelante se volverá sobre el asunto, determinante han sido los trabajos teóricos de, VEGA, Rubén, “Entre la derrota y la renovación generacional. Continuidad y protesta social” en MATEOS, Abdón (ed.), *La España de los cincuenta*, Madrid, Eneida, 2008, pp. 171-200; y de, TÉBAR, Javier, “La clase trabajadora en la «Gran Barcelona», 1951-1988. Reflexiones para el debate»” en id., (ed.), *El movimiento obrero...*, op.cit., pp. 85-115.

¹⁸⁹ Relevante resulta aquí el trabajo de, SÁNCHEZ MOSQUERA, Marcial, *Del miedo genético a la protesta: memorias de los disidentes del franquismo*, Sevilla / Barcelona, Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía / Ediciones de Intervención Cultural, 2008. Desde otra perspectiva complementaría: SABIO, Alberto, *Peligrosos demócratas: antifranquistas vistos por la policía política (1958-1977)*, Madrid, Cátedra, 2011.

¹⁹⁰ Sobre esta misma cuestión hablaremos largo y tendido en el Capítulo “11. En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (febrero-julio de 1984)”.

¹⁹¹ SÁEZ GARCÍA, Miguel Ángel y DÍAZ MORLÁN, Pablo, *El puerto del acero...*, op.cit..

¹⁹² Entre otros ya citados: GONZÁLEZ de ANDRÉS, Enrique, “La lucha contra...”, op.cit.; o, HEBENSTREIT, M^a, “Conflicto y cultura...”, op.cit..

todos sus elementos simbólicos y estéticos. ¿Romanticismo? Es posible, a pesar de que si algo representa aquella lucha de los trabajadores junto el pueblo –a través de sus multitudinarias e impresionantes asambleas– es el ejemplo de una derrota –por más que se la pueda calificar de *parcial* o *pactada*– con el calificativo de *histórica*.

Ya refiriéndonos a las *nuevas inercias* lo que se puede divisar es un desplazamiento interno dentro de la historia social en relación al objeto de estudio. Por este mismo camino, cada vez mayor ha sido la atención dada al movimiento vecinal durante la época en que nos movemos. Es decir, durante buena parte de la década de los setenta del siglo XX, dependiendo las fechas extremas de la región o localidad concreta. Es cierto que su estudio era una tarea pendiente. Como probablemente también sea cierto que para la nueva generación de historiadores resulte hoy mucho más “memorable” –empleando, de nuevo, aquí, el término utilizado en su día por Eric Hobsbawm, a la hora de descifrar las motivaciones que se encuentran detrás de cualquier investigación histórica¹⁹³– el estudio del tal sujeto colectivo social antes que internarse por el propio movimiento obrero, ya sea fuera o dentro de los *nuevos* o *viejos* movimientos sociales¹⁹⁴. Así pues, cabe interrogarse, ¿este *desplazamiento de intereses* puede achacarse a la anunciada “segunda ruptura”, en relación a ampliar el objeto de estudio, precisamente, en torno a los movimientos sociales? En ningún caso, tanto por el tiempo transcurrido así por el diferente camino emprendido al “previsto” allá a principios de los ochenta¹⁹⁵.

En esta permanente reactualización del estado de la cuestión, en estos últimos años contemplados se visualiza un continuado crecimiento de dicha temática. A nivel de tesis

¹⁹³ HOBBSAWM, Eric J., “¿Se ha detenido la marcha adelante del movimiento obrero?” en *Política para una..., op.cit.*, p. 39. En términos parecidos se expresaría el mismo Thompson: «Sólo se recuerda a los victoriosos (en el sentido de aquellos cuyas aspiraciones anticipaban la evolución subsiguiente). Las vías muertas, las causas perdidas y los propios perdedores se olvidan». THOMPSON, Edward P., “Prefacio” en *Obra esencial Edward..., op.cit.* p. 16.

¹⁹⁴ Respecto a esta misma cuestión polémica, nos remitimos, entre otros muchos trabajos a los siguientes: PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Nuevos y viejos movimientos sociales en la transición” en MOLINERO, Carme (ed.), *La transición, treinta..., op.cit.*, pp. 117-151; FLORENCIO, Rafael, *Sociedad y política en el siglo XX. Viejos y nuevos movimientos sociales*, Madrid, Síntesis, 1993; ALVAREZ JUNCO, José, “Movimientos sociales en España: del modelo tradicional a la modernidad post-franquista” en LARAÑA, Enrique y GUSFIELD, Joseph (eds.), *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994, pp. 413-442; MEES, Ludger, “¿Vino viejo en odres nuevos? Continuidades y discontinuidades en la historia de los movimientos sociales”, *Historia Contemporánea*, nº 16, (1997), pp. 219-254. Un caso aparte, lo constituiría –desde una perspectiva eminentemente teórica– CRUZ, Rafael, “El mitin y el motín. La acción colectiva y los movimientos sociales en la España del siglo XX”, *Historia Social*, nº 31, (1998), pp. 137-152. Dos últimos acercamientos de interés en: CALLE VELASCO, Mª Dolores y REDERO SAN ROMÁN, Manuel (eds.), *Movimientos sociales en la España del siglo XX*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2008, junto con el volumen colectivo ya citado de, CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo, FANDIÑO PÉREZ, Roberto y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Historia social, movimientos..., op.cit.* Por último, también se ha de tener presente las actas de un relevante congreso recogidas en, QUIROSA-CHEYROUZE y MUÑOZ, Rafael (ed.), *La sociedad española en la Transición: los movimientos sociales en el proceso democratizador*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.

¹⁹⁵ Recuérdese aquí las reflexiones realizadas en su día por Ramón García Piñeiro: «Ante la explicitud del conflicto de clase y la prioridad del cambio político, los nuevos movimientos sociales carecieron de atractivo. En un marco represivo, las mutaciones experimentadas durante la etapa *desarrollista* fueron insuficientes para propiciar el arraigo de valores ‘postmaterialistas’, propios de las sociedades desarrolladas y, por supuesto, democráticas. La debilidad de las clases medias ilustradas, la escasa incorporación de la mujer al trabajo y la acuciante necesidad del aparato ideológico del régimen, preservaron a España del flujo de corrientes de opinión y movimientos sociales como el feminismo, el pacifismo o el ecologismo», GARCÍA PIÑEIRO, Ramón, “El obrero ya..., op.cit.”, 113. En una línea crítica similar, RAMOS PALOMO, Mª Dolores, “La historia social contemporánea en España, 1975-1980 (Cenicienta y Princesa)”, *Baética*, nº 15, (1993), p. 402.

doctorales, habría que reseñar la de Constantino Gonzalo Morell, *Movimiento vecinal y cultura política democrática en Castilla y León. El caso de Valladolid (1964-1968)*¹⁹⁶. Pero ha sido a nivel de monografías y concretamente en relación a dos colectivas acerca del caso madrileño y del barcelonés, donde mayor proyección editorial ha tenido este campo de estudio. Así pues, de notable interés, serían las obras coordinadas por Vicente Pérez Quintana y Pablo Sánchez León, *Memoria ciudadana y movimiento vecinal: Madrid, 1968-2008*¹⁹⁷, y la de dirigida por Carme Molinero y Pere Ysàs, *Construint la ciutat democrática: el moviment veïnal durant el tardofranquisme i la Transició*¹⁹⁸. A sumarse al dossier monográfico coordinado por Xavier Domènech para *Historia del Presente*, nº 16, (2010) con el título, “Movimiento vecinal y cambio político”¹⁹⁹. No obstante, la mayor vía por donde se *detecta* este crecimiento –¿podríamos hablar de otro pequeño *salto adelante*?– es, justamente, en relación a las contribuciones en revistas científicas y congresos. Frente a la muy escasa presencia de estudios *obreristas*, cada vez es mal palpable una nómina de historiadores en proceso de consolidación: Iván Bordetas²⁰⁰, el propio Constantino Gonzalo Morell²⁰¹, Cristina Gómez Cuesta²⁰²...

No pocos retos le aguardan, por delante, dicha línea de investigación. Primero, la de contribuir al inacabado debate acerca del peso que tendrían tanto el movimiento obrero pero también los movimientos sociales, en los límites alcanzados en el proceso de cambio político y social durante la transición a la democracia. Segundo, su capacidad de movilización pero a su vez de *necesarios sujetos político-sociales* canalizadores en la construcción y configuración de una ciudadanía democrática. Y tercero, completar el mapa todavía incompleto de la *disidencia antifranquista*. Retos pero también *preguntas*: ¿pasará a corto-medio plazo dicha línea de investigación por los mismos *interrogantes* (y *males*) que la historia social –clásica– del movimiento obrero?

Si en los casos anteriores nos movemos en un *terreno resbaladizo*, en cambio, lo que parece cada vez más claro es la atracción de los historiadores sociales *consolidados* –tanto los de la segunda como tercera generación– por los asuntos originarios de la historia sociocultural, con la cuestión de la *identidad* y de la *experiencia* en primer lugar. No hace mucho tiempo, Javier Tébar en un magnífico texto, tras revisar los diferentes caminos por los que se ha movido

¹⁹⁶ GONZALO MORELL, Constantino, *Movimiento vecinal y cultura política democrática en Castilla y León. El caso de Valladolid (1964-1986)*, Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid, 2011.

¹⁹⁷ PÉREZ QUINTANA, Vicente y SÁNCHEZ LEÓN, Pablo (eds.), *Memoria ciudadana y movimiento vecinal: Madrid, 1968-2008*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008.

¹⁹⁸ MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere (coords.), *Construint la ciutat democrática: el moviment veïnal durant el tardofranquisme i la Transició*, Bellaterra / Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona / Icaria, 2010.

¹⁹⁹ DOMÈNECH, Xavier (ed.), *Movimiento vecinal y cambio político*. Dossier monográfico, *Historia del Presente*, nº 16, (2010).

²⁰⁰ BORDETAS, Iván, “«Las Asociaciones: futuro incierto». El movimiento vecinal en el proceso de cambio político”, comunicación presentada al *III Encuentro de Jóvenes Investigadoras de la AHC*, Vitoria, 2011 [jovenesinvestigadores2011.blogspot.com.es].

²⁰¹ GONZALO MORELL, Constantino, “Aportación del movimiento vecinal a la cultura democrática de la Transición en Valladolid. Los vecinos contra la dictadura” en ALDUNATE, Oscar y HEREDIA, Iván (coords.), *I Encuentro de...*, op.cit..

²⁰² GOMÉZ CUESTA, Cristina, “Luchas urbanas, voces ciudadanas: Los orígenes del movimiento vecinal, 1964-1982” en GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.), *Conflictividad y movimientos sociales en Castilla y León: del tardofranquismo a la democracia*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, pp. 95-124.

la historia social, concluía –con cita incluida de Pérez Ledesma para más señas²⁰³– con la siguiente afirmación:

«En este sentido, tal vez sea necesario que también los historiadores sobre este período y temática comencemos a plantearnos el examen, desde un punto de vista sociocultural, del itinerario de una ‘identidad colectiva’ tal como ha sido formulado por algunos autores: una identidad disponible para la movilización que tuvo en la acción continuada de los integrantes del movimiento obrero y sus creadores, interpretando las experiencias de los trabajadores y difundiendo los marcos conceptuales que permitían a estos últimos integrarse en aquella identidad colectiva. Esta no es una cuestión de fuentes, se trata de un enfoque distinto, desde luego»²⁰⁴.

Tiempo antes, Rubén Vega cuestionaba no pocos de los parámetros comúnmente aceptados, y se interna por las cuestiones subyacentes que estarían detrás del origen de una *nueva militancia industrial* –tal como la describiera en su momento José Babiano²⁰⁵– empezando por el propio peso de la *experiencia* pero también por las formas de transmisión de *saberes* entre las generaciones laborales antifranquistas en activo:

«Queda abierta de este modo la cuestión acerca de las posibles rupturas y continuidades forjadas en los años de mayor debilidad de la oposición al franquismo [la década de los cincuenta]. Sea cual sea la interpretación correcta, la cuestión generacional, la medida en que los jóvenes adoptan actitudes de integración o de disidencia, permanece como decisiva y sus causas últimas nos son mal conocidas. En parte porque las fuentes a las que se ha venido recurriendo arrojan poca luz al respecto y las que pudieran ofrecer mayores posibilidades han sido escasamente exploradas con este propósito [...] en parte porque ninguna fuente puede resultar concluyente»²⁰⁶.

Incluso el propio Xavier Domènech –tal frecuentemente criticado– se acercaría a este nuevo replanteamiento relacionado con el “estudio de las identidades obreras bajo el franquismo”. Recordando cómo tras despertar un “gran interés inicial”, el mismo “plagado de intuiciones al igual que de callejones sin salida, no se consolidó ni fue recogido en el momento de articulación y densificación interpretativa del fenómeno del nuevo movimiento obrero”²⁰⁷. En esta *vuelta al punto de partida*, tras constatar cómo una vez más la *gran* pregunta se alejaba de los principales focos de atención²⁰⁸, terminaba él mismo concluyendo –tras no pocos argumentos de peso– como estos “temas menores”, al final,

²⁰³ PÉREZ LEDESMA, Manuel, “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en CRUZ, Rafael y id. (eds.), *Cultura y movilización...*, *op.cit.*, p. 233.

²⁰⁴ TÉBAR, Javier, “La clase trabajadora en la «Gran Barcelona», 1951-1988. Reflexiones para el debate” en id. (ed.), *El movimiento obrero...*, *op.cit.*, p. 114. Del mismo autor, consúltese también: id., “Contraindicacions de la «política de la victoria». Notes sobre repressió i identitat de la militància obrera dels anys seixanta” en PAGÈS i BLANCH, Pelai (dir.), *Franquisme i repressió: la repressió franquista als països catalans (1939-1975)*, València, Universitat de València, 2004, pp. 273-294.

²⁰⁵ Refiriéndose al caso de Madrid afirmaba: «El primer gran impulso de los metalúrgicos madrileños [sector laboral que encabezaría la ‘protesta obrera’ en los sesenta] permite hablar de una *nueva militancia industrial*, habida cuenta de que la anterior oleada de agitación obrera en la capital nos remite a la primera de 1936, cuando las empresas del metal de numerosa plantilla empleaban a una exigua minoría de asalariados y cuando el sector más numeroso y combativo a la vez, no era otro que el de la construcción». BABIANO, José, “La conflictividad laboral en Madrid bajo el Franquismo (1962-1976)” en SOTO CARMONA, Álvaro (dir.), *Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical (Evolución Socio-Laboral de Madrid 1939-1991)*, Madrid, GPS, 1994, p. 191.

²⁰⁶ VEGA, Rubén, “Entre la derrota y la renovación generacional. Continuidad y protesta social” en MATEOS, Abdón (ed.), *La España de...*, *op.cit.*

²⁰⁷ DOMÈNECH, Xavier, “La formación de..., *op.cit.*, p. 287.

²⁰⁸ «Es este mismo análisis el que se ha visto revisitado en los últimos año, no yendo directamente a las conclusiones mayores (sus consecuencias para el proceso democratizador), aunque evidentemente

«puede ser lo que nos lleven a una reconsideración más global sobre la realidad del cambio político y la llegada de la democracia en España, frente a aquellas explicaciones que acentúan el papel de la modernización económica e incluso aquellas que quieren intentar combinar la realidad de un movimiento obrero movilizad para activar el cambio político con la misma moderación de la clase»²⁰⁹.

Una suma de interpretaciones en torno a temas similares que, una y otra vez, evidencian la fuerte *atracción* por los temas asociados a la historia sociocultural. No seremos nosotros quien levante la voz de alarma y de denuncia acerca del *revisionismo culturalista* de Tébar, Vega o el propio Domènech, sin excluir a Babiano puestos a la tarea. Ahora bien, ¿quién está autorizado a poner el *sello* y *certificar* tales *desviaciones*? Y volvemos aquí a una cuestión planteada con anterioridad: ¿Nos encontramos ante una *atracción irresistible* por las cuestiones relacionadas con la *identidad* que, en resumen, pueda suponer el final de la agenda investigadora de la historia social (clásica)? ¿Estamos ante una *moda pasajera* aconsejada por “malas influencias”? O acaso, ¿es un hecho estructural ya consolidado? Y, ¿es éste el *progreso* al que se refiriera Pérez Ledesma?

No creemos que esta *promiscuidad* constituya un elemento sospecho. Al contrario, es sano y saludable, y nos habla, en suma, de que la historia social del movimiento obrero avanza sin auto-limitaciones ni fronteras autoimpuestas ni *viejos militanismos*. Por tanto, debería evitarse conceptos como *enemigo* y *adversario*. Pero yendo al fondo, lo que viene a señalar buena parte de los historiadores citados, es una revisión de las tareas pendientes antes en línea con Piqueras que con Pérez Ledesma.

Lo que también se puede afirmar es que la distancia entre los planteamientos teóricos y sus posibilidades de aplicación práctica, resulta enorme. Y al mismo tiempo, ha de advertirse que no hay riesgo alguno a una vuelta al Marx, a los marxistas y sus correspondientes congéneres. Así en este permanente cruce de caminos, acaso, nos preguntamos por último, ¿lo que está proponiendo Tébar y *compañía* llega a los radicalismos detectados en los textos teóricos? Quien seguro estaría de volver a releerse –una vez más– sería el propio Miguel Ángel Cabrera, quien aquí sí podría detectar *materialismo* a raudales. En fin, la *identidad*, la *experiencia* bajo estos ángulos de visión, parecen que no convierten a los citados historiadores en sospechosos de internarse –implícita y sibilinamente– por algunos de los *peligros* que acechan a los *historiadores socioculturales*.

No obstante, por el camino de esta interminable crisis no pocos temas centrales de la historiografía obrerista han ido quedándose en un plano secundario, cuando no directamente han sido arrojados al “basurero de la historia”. No se trata de insistir, una vez más, en lo que pudiera parecer una retahíla de lamentos; por el contrario, se tratan de hechos constatados ya consolidados, que han erosionado los cimientos del conocimiento histórico. Así pues, el movimiento obrero, junto con su compañera inseparable la “clase obrera”, han perdido su centralidad historiográfica como sujeto histórico y sujeto político, respectivamente, de los principales cambios en las sociedades contemporáneas²¹⁰. La pérdida de esta misma *centralidad*, siempre reclamada por Tuñón de Lara –sin ningún tipo de radicalismo ni demagogia– constituye una de las más palpables *consecuencias deseadas* de tantos y tantos *giros* y *rupturas* tras *rupturas*:

«El movimiento obrero, desde que puede definirse con perfil y rasgos netos a mediados del siglo XIX, es una pieza esencial de nuestra historia. Y ello por la simple razón de que tiene una base, un contexto y hasta un ‘techo ideológico’, que son la propia historia nacional. Desde

marcado por ellas, sino intentado desmenuzar la orientación de alguno de sus puntos de partida a partir de la aproximación desde una perspectiva muy específica de las identidades obreras». *Ibidem*, pp. 286-287.

²⁰⁹ *Ibidem*, p. 296.

²¹⁰ Una revisión en torno a esta cuestión en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “El Movimiento Obrero en la España del tiempo vivido: del *sujeto político* al nuevo «precariado»” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y id. (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*, pp. 199-226.

esas fechas, la vida nacional no puede concebirse sin los obreros; y, a su vez, sin las peculiaridades de la historia nacional toda idea del movimiento obrero caería en la abstracción más estéril»²¹¹.

En todo caso, esta cuestión también se ha visto condicionada por lo que en su momento explicaría el sociólogo francés Robert Castel,

«[s]i la historia social giró durante más de un siglo en torno a la cuestión obrera, fue porque el movimiento obrero realizaba la síntesis de esas tres condiciones: tenía sus militantes, sus aparatos, un proyecto de futuro, y era el principal productor de la riqueza social en la sociedad industrial»²¹².

Desde otro *enfoque* y otro *tono*, Rafael Cruz también lo ha esbozado con suficiente claridad,

«la clase obrera y el movimiento obrero ya son historia. Una historia de aproximadamente setenta o setenta años, entre el fin de la segunda década y los años ochenta del siglo XX [...]. Como otras, una identidad colectiva que se forma, transforma, deforma, se encumbra, se margina, se politiza, se integra en otras, aparece y desaparece... y los rasgos de su presencia siempre se relacionan con los procesos políticos vigentes»²¹³.

Desplazado, por tanto, el movimiento obrero en línea con la proclamada *renovación*²¹⁴ – a modo de necesaria e irrefutable “modernización” y “europeización” de nuestra historiografía social– otros tantos sujetos históricos (re)descubiertos para la ocasión, o normalmente catapultados de las profundidades de la historia, han adquirido un *relevante* protagonismo en los relatos históricos sobre la historia contemporánea de España del siglo XX²¹⁵.

²¹¹ TUÑÓN de LARA, Manuel, *El movimiento obrero...*, *op.cit.*, vol. I, p. 12. Y sobre el movimiento obrero proporcionaba la siguiente definición: «El movimiento obrero se presente, a la vez, como una actividad y como una toma de conciencia de la condición social; ella supone la exigencia de actuar solidariamente ya que la producción es un fenómeno social [...]. Sin embargo, lo que llamamos *movimiento obrero* es el acto de asociarse los obreros, temporal o permanentemente, con fines profesionales o también políticos, pero siempre en función de su naturaleza obrera». *Ibidem*, vol. I, p. 10.

²¹² CASTEL, Robert, *Las metamorfosis de...*, *op.cit.*, p. 445.

²¹³ CRUZ, Rafael, “El órgano de la clase obrera. Los significados de movimiento obrero en la España del siglo XX”, *Historia Social*, n° 53, (2005), p. 174.

²¹⁴ Desde entonces numerosos y conocidos estudios han sido publicados. Al mismo tiempo que tuvieron por objetivo superar ciertos esquematismos y determinismos marxistas a la hora de historiar la clase obrera, el movimiento obrero, así como sus líderes –la tríada tradicional– pretendieron, a su vez, incorporar nuevas preocupaciones centradas en lo cultural, las formas de sociabilidad, el lenguaje... Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre este grupo de obras y las nuevas aproximaciones procedentes de la historia sociocultural. Las mismas siempre tuvieron presentes los factores materiales como elementos determinantes en la construcción del discurso histórico. Véanse, entre otras muchas posibles, TILLY, Charles, TILLY, Louise y TILLY, Richard, *The Rebellious Century, 1830-1930*, Cambridge / Massachusetts, Harvard University Press, 1975 [*El siglo rebelde, 1830-1930*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997]. Sobre el conocido *clan familiar* véase la más que interesante aportación de, FUNES, M^a Jesús (ed.), *A propósito de Tilly. Conflicto, poder y acción colectiva*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2012; y, HOBSBAWM, Eric J., *Trabajadores...*, *op.cit.*; RUDE, George, *La multitud en la historia: los disturbios populares en Francia e Inglaterra 1730-1848*, Madrid, Siglo XXI, 1979. O más recientemente la reedición en castellano de la obra, WILLIS, Paul E., *Aprendiendo a trabajar...*, *op.cit.*

²¹⁵ Más allá de lo apuntado, valga decir como en línea con la proclamada revisión de la historia social, resulta ilustrador observar no pocos trabajos publicados a partir de los congresos historiográficos centrales, que han tenido lugar en las últimas décadas. Por ejemplo, los procedentes del V Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, que llevó por título, *El siglo XX: balance y perspectivas*, recogidos en, ROMERO, M^a Cruz y SAZ, Ismael (eds.), *El siglo XX. Historiografía e historia* [5^o, Valencia, 2000], Valencia, Universitat de València, 2002. Entre otros: MILLÁN, Jesús, “Los sujetos históricos: modelos, tipos ideales y estrategias de investigación”, (pp. 101-110); y, CASANOVA, Julián, “Las caras cambiantes del sujeto histórico: en busca de la igualdad” (pp. 111-115). Tiempo antes:

La nueva historia social “[c]ambió al protagonista de la historia”²¹⁶. A la par que el proclamado *giro cultural* se “ha convertido casi en un dogma interdisciplinar”²¹⁷. A su vez el relato histórico se diluyó en una inacabada e infatigable búsqueda de los *espacios de sociabilidad*²¹⁸, de lo *cotidiano*²¹⁹, de los *lenguajes*²²⁰, de los *conceptos*²²¹ y sobre todo de la

BONAMUSA, Francesc y SERRALLONGA, Joan (eds.), *La sociedad urbana en la España Contemporánea [II Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, 1994]*, Barcelona, Asociación de Historia Contemporánea, 1994; o, CASTILLO, Santiago y OLIVER, Pedro (coords.), *Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y marginados [V Congreso de Historia Social, noviembre de 2006]*, Madrid, Siglo XXI, 2007.

²¹⁶ PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, “Expansión y retos de la historia social” en *¿Qué entendemos hoy... op.cit.*, p. 201.

²¹⁷ FORCADELL, Carlos, “La historia social, de la «clase» a la «identidad»” en HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y LANGA, Alicia (eds.), *Sobre la historia...*, *op.cit.*, p. 19. De muy distinta opinión es Jorge Uría, quien además de afirmar como la *perspectiva cultural* se ha convertido en un nuevo paradigma, valora positivamente la *revolución* que ha supuesto este ‘giro’ en la historiografía: «Que el enfoque cultural pueda acabar erigiéndose en criterio omnicompreensivo de la historia social es asunto que, en rigor, sólo podrá resolverse con el paso del tiempo. Por el momento, desde luego, constituye una perspectiva que puede discutirse desde la pluralidad metodológica que ahora caracteriza a la profesión; pero lo que está claro, sin duda alguna, es que su mirada ha cambiado radicalmente nuestro modo de enfocar y de tratar los datos del pasado [...]. Lo social se ve ahora más bien como un resultado complejo de los condicionantes e intereses económicos, por supuesto, pero también de la acción y la reproducción cultural, de la socialización política, de la iniciativa de individuos o grupos o de la movilización de redes; cuestiones todas ellas que antes apenas si contaban en la explicación causal de la historia de la sociedad. Aun con todos los problemas que abre, una perspectiva de esta naturaleza ha supuesto forzar cambios temáticos, teóricos y de método de los que hay que felicitarse». URÍA, Jorge, “La historia social hoy” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, p. 247.

²¹⁸ Uno de los más destacados ejemplos de sus *posibilidades y limitaciones* en, NAVARRO NAVARRO, Francisco Javier, “Mundo obrero, cultura y asociacionismo: Algunas reflexiones sobre modelos y pervivencias formales”, *Hispania*, vol. LXIII/2, n° 214, (2003), pp. 467-484, trabajo incluido en el dossier, “Espacios y formas de la sociabilidad en la España contemporánea”. También se ha de citar en aquel mismo volumen el trabajo del propio, URÍA, Jorge, “La taberna: un espacio multifuncional de sociabilidad popular en la Restauración española” (pp. 146-175). E igualmente a destacar la tesis de, MARÍN GÓMEZ, Isabel, *Asociacionismo, sociabilidad y movimientos sociales en el franquismo y la transición a la democracia: Murcia, 1964-1986*, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2007.

²¹⁹ CASTELLS, Luis, “La historia de la vida cotidiana” en HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y LANGA, Alicia (eds.), *Sobre la historia...*, *op.cit.*, 37-62; y FOLGUERA, Pilar, “La construcción de lo cotidiano durante los primeros años del franquismo”, *Ayer*, n° 19, (1995), pp. 165-188, artículo incluido en un dossier de la citada revista dedicado, precisamente, a *La historia de la vida cotidiana*.

²²⁰ CHARTIER, Roger, “Historia, lenguaje, percepción. De la historia social de la cultura a la historia cultural de lo social”, *Historia Social*, n° 17, (1993), pp. 97-113; BURDIÉL, Isabel y ROMERO, Mª Cruz, “Historia y Lenguaje: la vuelta al relato dos décadas después”, *Hispania*, vol. LVI, n° 192, (1996), pp. 333-346; RORTY, Richard, *El giro lingüístico. Dificultades metafísicas de la filosofía lingüística*, Barcelona, Paidós, 1990. Investigaciones concretas ya citadas en, PÉREZ LEDESMA, Manuel, “El lenguaje de la ciudadanía en la España contemporánea” en id. (dir.), *De súbditos a...*, *op.cit.*. Una de las últimas aproximaciones la podemos encontrar en la *introducción* que abre un dossier en, JARA FUENTE, José Antonio, “Introducción. Lenguaje y discurso: percepciones identitarias y construcciones de identidad”, *Hispania*, vol. LXXI, n° 238, (2011), pp. 315-324. Desde otra óptica radicalmente distante hasta lo aquí dicho en, RODRÍGUEZ VALDÉS, Rafael, VEGA, Rubén y VIEJO FERNÁNDEZ, Xulio (eds.), *Llingua, Clase y Sociadà (actes del Seminariu ‘Llingua, Clase y Sociadà, Uviéu, 27-30 de marzu del 2006)*, Uviéu, Trabe, 2008.

²²¹ En primer remitimos a, KOSELLECK, Reinhart, *Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos*, Barcelona, Paidós, 2003, así como a varios de los trabajos contenidos en el dossier monográfico de *Ayer*, n° 53, (2004) –“Historia de los conceptos”– y de forma específica la introducción de los editores en, FUENTES, Juan Francisco y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, “A manera de introducción. Historia, lenguaje y política”, pp. 11-26. Del propio Juan Francisco Fuentes véase su

*identidad*²²². Lo cual, si bien ha permitido tener un relato no sólo más rico y complejo –por más que la anterior y necesariamente sintética valoración tan sólo se quede en la superficie de muy relevantes cambios de nuestra disciplina– en tanto nuevos *actores* y *espacios* se han ido intercalando en la narración sobre nuestro pasado, al ir “descubriendo”, en paralelo, otras realidades históricas que habían pasado “inadvertidas” a ojos de los historiadores²²³; por otro lado, el *imperante* relativismo epistemológico²²⁴ y la creciente desafección con todo lo que tenga que ver con el “mundo obrero”, lo “político” y concretamente con la “clase”²²⁵, ha imposibilitado un diálogo fluido entre el *viejo paradigma* y las nuevas líneas de investigación de historia social pero también procedente de otras tradiciones y enfoques. Todo ello con una consecuencia directa: la parcelación del conocimiento histórico, hasta el punto de la imposibilidad de dotarnos de una imagen global de la Historia. La *historia en migajas* ha transmutado en principio de realidad²²⁶. De modo que, como advirtió Josep Fontana a principios de los años ochenta:

«Es necesario reconstruir la imagen global de la sociedad, como propuso un día el materialismo histórico, pero no para fabricar un caleidoscopio de aspectos diversos, sino para centrar toda esta diversidad en torno a lo que es fundamental: los mecanismos que aseguran la explotación de unos hombres por otros [...]. Entenderemos entonces hasta qué punto las

entrada de *clase* y *clase obrera* en un conocido diccionario: id., “Clase” en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y id. (eds.), *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Madrid, Alianza, 2002, pp. 156-161; y, id., “Clase obrera” en *ibídem*, pp. 167-170.

²²² GOMÉZ GARCÍA, Pedro (coord.), *Las ilusiones de la identidad*, Valencia, Frónesis, 2001. Véanse asimismo los trabajos contenidos en, BERAMENDI, Justo y BAZ, Manuel J. (eds.), *Identidades y memoria imaginada [7º, 2004, Santiago de Compostela y Orense]* Valencia, Publicacions Universitat de València, 2008. Sobre los alcances de todos estos ‘giros’ aquí simplemente delineados, HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, “El presente de la historia y la carambola del historicismo” en id. y LANGA, Alicia (eds.), *Sobre la historia...*, *op.cit.*, pp. 287-322.

²²³ De la misma opinión sería Jürgen Kocka cuando decía: «Las historias que cuentan se han vuelto más complejas. Los historiadores sociales relacionan mejor las estructuras y procesos con las percepciones y los hechos. El estudio de los intereses es complementado con el estudio de las experiencias. Los historiadores sociales han aprendido a tomar en serio el lenguaje [...]. Su trabajo se ha hecho más reflexivo». KOCKA, Jürgen, “Historia social-Un Concepto relacional” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, pp. 160-161. Del citado historiador véanse dos de sus trabajos claves: id., *Historia social: concepto, desarrollo, problemas*, Barcelona, Laia, 1989; y id., *Historia Social y conciencia histórica*, Madrid, Marcial Pons, 2002.

²²⁴ LINDEN, Marcel van der, “Acumulación y fragmentación” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, p. 166. Un relativismo que mucho tiene que ver con la consolidación de una discurso historicista de raíz posmodernista como adelantaron hace años, POSTER, Mark, *Critical Theory and Poststructuralism: In Search of a Context*, London, Cornell University Press, 1989; o, EAGLETON, Terry, *The Illusions of Postmodernism*, Oxford, Wiley / Blackwell, 1996. Asimismo remitimos a los autores –y sus tesis manejadas– ya citados en la presentación: entre ellos Frederic Jameson –*El podermodernoismo o...*, *op.cit.*– o Perry Anderson –*Los orígenes de...*, *op.cit.*–. Para el caso español consúltese dos enfoques diametralmente opuestos en, CASANOVA, Julián, “Introducción”, pp. 3-6; y, CABRERA, Miguel Ángel, “El debate postmoderno sobre el conocimiento histórico y su repercusión en España”, pp. 141-164, ambos incluidos en el dossier, *Ficción, verdad, historia* en *Historia Social*, nº 50, (2004).

²²⁵ «Quizá en estos últimos veinte años hayamos estado a punto de perder al sujeto ‘clase’, pero no como nos advertía Tuñón de Lara al sustituir la clase o las vanguardias, por el individuo, sino al oponer de manera irreductible lo particular del individuo a la expresión de su ser social, al sentido colectivo de su capacidad para organizarse y defender sus intereses, a sus manifestaciones a través de las simbologías y los lenguajes codificados, o negando, indirectamente, su existencia al desnaturalizar su relación con el sujeto colectivo por excelencia, el Estado». BARRIO ALONSO, Ángeles, “Clase obrera y movimiento obrero: ¿Dos compañeros inseparables?” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de...*, *op.cit.*, p. 88.

²²⁶ DOSSE, François, *La historia en migajas. De “Annales” a la “nueva historia”*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1988.

concepciones ideológicas que favorecen la continuidad del capitalismo están ancladas en nuestras mentes y determinan, sin que lo advirtamos, incluso nuestros valores ‘morales’ o nuestros conceptos de lo que es ‘natural’ o aberrante. Sólo cuando seamos capaces de comprender la coherencia del sistema entero en que vivimos inmensos podremos llegar a repensarlo, desmontarlo pieza a pieza y planear su sustitución por otro basado en un nuevo juego de valores, acordes con las características que ha de tener la sociedad del socialismo»²²⁷.

Conceptos como *explotación*, *conflicto*, *clase social*... aparecen, pues, como viejas e incómodas reminiscencias de otros tiempos²²⁸. De ahí que Carlos Forcadell, por ejemplo, dijera, “la clase permanece innombrable, incluso como representación, invento, símbolo ordenador de las experiencias, matriz cultural de significados y acciones”²²⁹. Expresión de lo aquí dicho ha sido el giro de 180 grados en el propio vocabulario histórico²³⁰. Así pues, y como ha recordado el economista Diego Guerrero en una interesante y abierta lectura –a modo de resumen– de *El capital*, uno de los esfuerzos centrales del propio Carlos Marx fue la creación de “un *sistema de categorías* que dé cuenta por completo de la *esencia* social moderna”²³¹. Un *sistema de categorías* tanto más necesario en un tiempo en donde la posibilidad de objetivar lo más posible las realidades históricas, ha dejado de ser una premisa para la mayoría de las investigaciones en marcha.

Vistos los límites que han alcanzado algunos *sesudos* debates historiográficos –hasta llegar, en ocasiones, a una situación límite o de simple “esquizofrenia” en palabras, de nuevo, de Forcadell²³²– en todo caso, nos es obligado, en primer lugar, no *caer* en una “nostalgia industrial”²³³, o en un *revival* de “añoranza”²³⁴, o en un mero y autocomplaciente “sentimentalismo”²³⁵. Pues como advirtió Eric Hobsbawm,

²²⁷ FONTANA, Josep, *Historia: Análisis del...*, *op.cit.*, p. 260.

²²⁸ Sobre esta cuestión nos remitimos, una vez más, a la *Presentación*, *nota 37*, *nota 70*, *nota 109*, *nota 119*, *nota 120*, *nota 129*, entre otras.

²²⁹ FORCADELL, Carlos, “La historia social, de la «clase» a la «identidad»” en HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y LANGA, Alicia (eds.), *Sobre la historia...*, *op.cit.*, p. 17. Añadiendo: «Para muchos la cuestión no consiste tanto en negar la clase, ni el cambio social, sino en reconocer que los lazos de identidad social o política han estado constantemente condicionados e incluso parcialmente producidos a través de otra suerte de identidades [...]. Otro asunto es que, a todo esto junto, sumado y revuelto, se le denomine ‘cultura’, concepto que no acaba de definir con claridad un espacio de análisis, o ‘identidad’, por analogía. Y otro asunto, más distinto aún, es que interese defender que los conflictos básicos hoy, y en la historia, ya no se deben definir por diferencias económicas, sociales e ideológicas, sino que los enfrentamientos fundamentales lo son por razones culturales». *Ibíd.*, p. 29.

²³⁰ Véase, en primer lugar, el texto clásico de, VILAR, Pierre, *Iniciación al vocabulario...*, *op.cit.*. Ahora bien, como ha ironizado, una vez más, José A. Piqueras se ha pasado del hecho de «que muchos profesores progresistas utilizaban un lenguaje marxistizado», recordando a su vez que «un vocabulario no comporta en sí mismo univocidad y coherencia conceptual, ni tampoco supone el método analítico en que ha sido concebido para operar». PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, pp. 68-69.

²³¹ GUERRERO, Diego, *Un resumen completo...*, *op.cit.*, p. 17. Véase lo ya apuntado en la *Presentación*, *nota 177*.

²³² FORCADELL, Carlos, “Sobre desiertos y...”, *op.cit.*.

²³³ URÍA, Jorge, “La historia social hoy” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, p. 238.

²³⁴ GARCÍA CALAVÍA, Miguel Ángel, “La «edad de oro» de las relaciones industriales: elementos de interpretación teórica”, *Papers*, nº 75, (2005), pp. 11-33. Un texto en donde se avisaba como lo que, «caracteriza el nuevo tiempo es el predominio de la aproximación neoliberal a los problemas del mundo laboral». *Ibíd.*, p. 14.

²³⁵ MCDONELL, Lawrence T., “«Sois demasiados sentimentales»: Problemas y sugerencias para una nueva historia del trabajo”, *Historia Social*, nº 10, (1997), pp. 71-100.

«[n]o lleva a ninguna parte simplemente lamentarse por esta pérdida de conciencia de clase (aunque yo, como viejo marxista, siga lamentándome) ni tampoco retirarse a una de las pocas reservas naturales que quedan para que pueda seguir observando al viejo proletario bueno»²³⁶.

Una de las primeras tareas para retomar el *pulso* a la historia social del movimiento obrero es la de volver a reconceptualizar –y se quiere “re-materializar”²³⁷– las bases centrales de un discurso histórico que se pretenda globalizador. Una historia que sea capaz de romper con la hegemonía –en un sentido *gramsciano*²³⁸– en que la está sumergida –dentro de un “capitalismo exultante y sin alternativa utópica en lontananza”²³⁹– y que se ha mostrado incapaz de trascender la propia coyuntura desde donde se piensa y se produce.

Cuestiones a la que se suma, finalmente, un problema de hondo calado metodológico como denunció el historiador argentino Luis Alberto Romero:

«Esto no significa que el viejo paradigma haya sido reemplazado por otro que ofrezca las mismas seguridades, que permita presentar dibujos tan claros y orgánicos como los de la ‘historia del movimiento obrero’. Por el contrario, quienes han abandonado las viejas seguridades son conscientes de estar en terreno movedizo y de que, en realidad, carecen de respuestas categóricas para preguntas y cuestionamientos. El principal problema es que se han propuesto estudiar un sujeto elusivo, que no sólo no puede medirse sino que, en rigor, no puede definirse con precisión»²⁴⁰.

Llegados aquí, y de cara a dar el *salto* de lo teórico a lo práctico e ir bajando a las realidades concretas, cercanas y próximas a nuestra investigación, en lo que se refiere a las permanentes *idas y vueltas* de la importancia recientemente dada a determinados sujetos históricos contemporáneos; estas *nuevas* lecturas sobre este mismo tiempo histórico en el que nos movemos, han tendido a reforzar determinados *consensos historiográficos* así como el

²³⁶ HOBSBAWM, Eric J., “¿Adiós al movimiento obrero clásico?” en *Política para una..., op.cit.*, p. 164.

²³⁷ Nos movemos aquí en las tesis manejadas por, JOYCE, Patrick, “Lo social en la historia social” en *¿Qué entendemos hoy..., op.cit.*, p. 158.

²³⁸ Más allá de lo apuntado en la *Presentación, nota 69 y nota 70*, las palabras de Gramsci sobre el concepto de hegemonía y la dirección de los grupos rectores sigue siendo pertinentes. Precisamente en uno de sus más comentados textos *Notas sobre Maquiavelo* sus tesis puede llegar a tener una traducción consistente para nuestro tiempo: la producción historiográfica ha dejado de interrogarse por los propios *mecanismos de reproducción consensual* existentes. Pues tal y como planteó el propio Gramsci estos mecanismos no sólo pueden imponerse por la *coerción*, sino también por el *consenso*, siendo predominante esta segunda forma en los sistemas democráticos estables y consolidados. El pensador italiano lo concretaría de la siguiente forma: «[E]l hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se tienen en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales se ejerce la hegemonía, que se forma un cierto equilibrio de compromiso, es decir que el grupo dirigente haga sacrificios de orden económico-corporativo, pero es también indudable que tales sacrificios y tal compromiso no pueden concernir a lo esencial, ya que si la hegemonía es ético-política no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica». GRAMSCI, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el estado moderno*, Madrid, Nueva Visión, 1980, p. 73. Sobre estas importantes cuestiones véanse, GRUPPI, Luciano, *Il concetto di egemonia in Gramsci*, Roma, ER, 1972; PORTELLI, Hugues, *Gramsci y el bloque histórico*, Madrid, Siglo XXI, 1978; BUCI-GLUCKSMANN, Christine, *Gramsci y el estado: hacia una teoría materialista de la filosofía*, Madrid, Siglo XXI, 1978; y de forma concreta y destacada, FERNÁNDEZ BUEY, Francisco, *Leyendo a Gramsci*, Barcelona, El Viejo Topo, 2001.

²³⁹ URÍA, Jorge, “La historia social hoy” en *¿Qué entendemos hoy..., op.cit.*, p. 241.

²⁴⁰ ROMERO, Luis Alberto, “Los sectores populares urbanos como sujetos históricos”, *Última década*, nº 7, (1997), p. 3.

“discurso canónico de la transición”²⁴¹ –siendo aconsejable “distinguir lo que la transición tiene de ideología y lo que representa como modelo histórico”²⁴²–. Pero es que además en un ejercicio de *falso equilibrio* se ha borrado, de un plumazo, los principales episodios de lucha de clases y, con él, se ha llevado por delante parte de la memoria democrática y social del movimiento obrero²⁴³.

Por otro lado, el citado desplazamiento de la *antaña centralidad* ha conllevado, igualmente, que el movimiento obrero ni la clase obrera y lógicamente sus protagonistas –incluida aquí desde la propia dirigencia y el cuadro político y/o sindical hasta el militante de base– tengan mayor papel en esta misma narración dominante, excepto en aquellos *episodios* en donde fueron partícipes de los hechos históricos que han tendido a leerse en términos de *conciliación*, *acuerdos*, *dialogo* y, claro está, *paz social*. Términos, conceptos que se citan sin cesar en títulos y resúmenes ejecutivos para tratar de reflejar a un periodo histórico, en donde por más que se firmarán numerosos acuerdos de todo tipo y naturaleza, los mismos no terminarían ni con la extendida conflictividad obrera –incluyéndose aquí un nivel de violencia física considerable– ni posibilitarían la paz social en términos tanto *absolutos* como *relativos*. Estamos, qué duda cabe, ante otro de los grandes consensos historiográficos. Un *consenso débil* que se viene abajo a toda prisa en el momento en que se contrasta con las realidades sociales y estadísticas, del periodo histórico que se inicia con la transición a la democracia y que se puede rastrear, sin dificultad, hasta mediados de los años ochenta en las principales ciudades y regiones industriales de España. De nuevo, se hace patente el predominio de una historia política *de corte* institucional, que no es capaz de visualizar más mundo –en no pocas

²⁴¹ No deja de resultar sintomático que uno de los promotores académicos de este discurso canónico se haya referido al mismo de la siguiente forma: «Y ese resultado [elecciones generales de 1977] fue el punto de partida de otra transición: la después canonizada, la del consenso y el pacto, la que generó la Constitución durante más tiempo vigente de nuestra historia; o la democracia, la de la renuncia y la abdicación, la que anegó a la ciudadanía en el desencanto». JULIÁ, Santos, “Qué obstáculos para qué transiciones” en RISQUES, Manel, VINYES, Ricard y MARÍ, Antoni (dirs.), *En Transición*, Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona / Dirección de Comunicación de la Diputación de Barcelona, 2008, p. 177. Del mismo autor, véase, id., “Tres apuntes sobre memoria e historia” en *Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX*, Barcelona, RBA, 2010, pp. 335-375. Asimismo no debería pasar desapercibida la crítica que formula Xavier Domènech en ese mismo volumen colectivo citado sobre el propio relato institucionalizado de la transición a la democracia: «La transición definida como período histórico, como período clave de nuestra memoria histórica pública y política, precisamente por su carácter líquido tiene la doble virtud de formar parte a la vez de un recuerdo construido y de necesario olvido para poder seguir manteniendo la legitimidad del Estado [...]. En este sentido decir que durante la transición, como han hecho algunos lúcidos historiadores, se decidió consensualmente ‘echar al olvido’ parte de nuestro pasado [...] es tan solo una parte de la verdad. La transición, como categoría de ordenación de nuestro pasado, como ente legitimador y normativo, es en sí mismo una construcción desmemoriada». DOMÈNECH, Xavier, “Tempus fugit” en RISQUES, Manel, VINYES, Ricard y MARÍ, Antoni (dirs.), *En Transición...*, *op.cit.*, p. 187. Véase por último las hipótesis de trabajo mantenidas en, PÉREZ SERRANO, Julio, “La Transición a la democracia como modelo analítico para la historia del presente: un balance crítico” en QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael (coord.), *Historia de la Transición en España: los inicios del proceso democratizador*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 61-76. Y para un enfoque teórico dentro de ese mismo volumen colectivo, ARÓSTEGUI, Julio, “La Transición a la democracia, «matriz» de nuestro tiempo reciente” (pp. 31-43).

²⁴² GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen y NICOLÁS, Encarna, “Perspectivas historiográficas en las transiciones políticas contemporáneas a la democracia” en GONZÁLEZ MADRID, Damián A. (coord.), *El franquismo y la transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, p. 203.

²⁴³ Una visión crítica en torno a la *lectura institucionalizada* en torno al movimiento obrero durante la transición, y los primeros gobiernos de la democracia, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Presentación. La «memoria democrática» como conflicto” en id. (coord.), *La memoria como...*, *op.cit.*; y en, id., “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*, entre otros trabajos.

ocasiones– de lo que ocurre y deja de ocurrir en los salones en donde se negociarían los acuerdos que fundamentarían, a la postre, el también mito de la *concertación social*²⁴⁴.

3.3. Debates, lecturas y controversias en torno al *nuevo* movimiento obrero en la España de la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos

Dejando ya aparte las principales lecturas y debates teóricos, interesa detenernos en cómo los mismos se han trasladado –a su medida– a las propias interpretaciones históricas. Es decir, de qué forma los anteriores marcos conceptuales se han traducido en el estudio de acontecimientos claves en la reciente historia contemporánea del país. Ello por más que, hasta el momento, se desconozca aproximación alguna –o al menos intento– por parte de los historiadores *postsociales* –o bueno, si se prefiere *postobjetivistas*– de cara a trasladar sus *lucidas* reflexiones en el que es, sin duda, uno de los grandes debates de este tiempo: el papel histórico jugado por la oposición antifranquista y concretamente por parte del movimiento obrero en el proceso de cambio político y social que acompañaría a la transición. Un relevante debate que cobra sí cabe más importancia, ya que nos aproxima a los propios antecedentes de nuestra investigación.

Un planteamiento –como decíamos– que tiene la virtud de ayudarnos a resituarnos, el papel histórico de los padres y madres o directamente de la “generación” de la clase trabajadora que precedería a la primera *generación de la cultura de la precariedad*, y que vivirían, además, en primera persona la década de la consolidación de la democracia.

Despojada de su centralidad la cuestión obrera, una buena parte de la *nueva* historia social interesada por una creciente “multitud”, ha encontrado en el estudio de los sujetos relegados de los grandes relatos a los necesarios “compañeros de viaje” del movimiento obrero²⁴⁵. Así pues, en lo que se ha constituido en una exploración por los vericuetos y entrañas de la oposición antifranquista –a fuerza de buscarlos– han ido apareciendo una infinidad de *nuevos* sujetos protagonistas con diferentes grados de relevancia histórica en este mismo tiempo.

El cada vez más reñido protagonismo de todos y cada uno de los *actores en juego* revela, sin embargo, una permanente atención por parte de una minoría activa de la historiografía española interesada por interpretar otras realidades históricas. *Realidades* que no comienzan ni finalizan con las élites políticas, que protagonizaron los cambios políticos del país en la segunda década de los setenta como había sido nota común hasta entonces. Así pues, si hoy buena parte de la historiografía contemporánea comienza a otorgar un creciente valor a la tesis de que “la caída [de la dictadura] se produjo gracias a la presión de la calle” –a pesar de que quien esboza esta idea no comparte en toda su plenitud tal afirmación²⁴⁶– lo que no ha

²⁴⁴ Harto significativo de lo aquí planteado fue el dossier monográfico publicado en *Pasado y Memoria*, n° 9, (2010), titulado *Consenso y enfrentamiento en la Democracia española*. Véase dentro del mismo, GONZÁLEZ, Ángeles, “Confrontación y consenso: la concertación social y el juego de intereses (1977-2010)” (pp. 101-128). Como contrapunto, YSÀS, “La imposible «paz social»: el movimiento obrero y la dictadura” en MATEOS, Abdón (ed.), *Dictadura y antifranquismo*. Dossier monográfico, *Historia del Presente*, n° 9, (2007), pp. 7-26. En cualquier caso, de forma extendida y prácticamente monográfica se volverá a lo largo de los diferentes capítulos del Epígrafe “IV. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”.

²⁴⁵ Véase lo apuntado previamente en la *nota 124* y *nota 214*.

²⁴⁶ ORTIZ HERAS, Manuel, “Movimientos sociales y sociabilidad en Castilla-La Mancha durante el segundo franquismo” en MATEOS, Abdón y HERRERÍN, Ángel (eds.), *La España del presente: de la dictadura a la democracia [II Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores del Presente] [2º, 2005, Madrid]* Segovia, Asociación de Historiadores del Presente, 2006, pp. 309. El autor siguiendo la tesis expuestas por José ALVAREZ JUNCO –“Movimientos sociales en España: del modelo

generado tanto consenso entre las filas académicas es el principal valedor o valedores de este “logro democrático”. El movimiento obrero, principalmente a través de Comisiones Obreras y del “partido del antifranquismo”²⁴⁷ – el PCE– llegarían a alcanzar un *tibio* consenso en torno a su caracterización como el principal protagonista del “cambio político” durante los primeros años de la post-transición.

Un *mérito* efímero hasta la llegada de la “segunda ruptura”. Aunque aquí, una vez más, sea aconsejable distinguir el propio debate teórico de las propias realidades investigadoras, en tanto no está probada una relación *causa-efecto*. Así pues, a partir del aquel momento otros nuevos sujetos históricos individuales o colectivos nacidos al *calor* de las nacientes líneas de investigación, irían reclamando un papel cada vez más preponderante en el relato de los hechos. Un *giro* que como destacaría Rubén Vega coincidiría, y no casualmente, con la llegada al poder del PSOE en 1982²⁴⁸ como también se ha adelantando en páginas anteriores.

De ahí, en adelante, un significativo número de las investigaciones publicadas han terminado identificando la mejora de nuestro conocimiento con *novedosas* interpretaciones – acompañándose, en más de una ocasión, de nuevos enfoques metodológicos– con una inusitada *sobrevaloración* en torno al protagonismo de estos nuevos actores en el marco de la reconstrucción histórica ofrecida. Ahí están el caso de la “sociedad civil” y el heterogéneo conjunto de sujetos enmarcados dentro de los movimientos sociales, que *rivalizan* por lograr el estatus que, en un momento histórico muy concreto, alcanzó el movimiento obrero y parte de la oposición política.

En primer lugar, el enfoque interpretativo a través de la “sociedad civil”, a pesar de contar con un numeroso *corpus* teórico²⁴⁹, no ha conseguido acaparar mayores adhesiones, ni tampoco situarse como una explicación plausible acerca del “cambio político”. Un modelo de explicación que, aunque ha tomado a “los de abajo” como los principales protagonistas en su construcción del relato, ha obviado los elementos supra-estructurales así como apenas ha concedido *audiencia* a las organizaciones políticas y sindicales. De ahí que Joe Forewaker en su conocida tesis doctoral, demasiado apegada a “un entorno Rousseauiano” como él mismo

tradicional a la modernidad post-franquista” en LARAÑA, Enrique y GUSFIELD, Joseph (eds.), *Los nuevos movimientos...*, *op.cit.*– cuestiona la idoneidad de los argumentos mantenidos por, entre otros investigadores Pere YSÀS –*Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975*, Barcelona, Crítica, 2004–. Véanse también las ‘objeciones’ de unos de los *aludidos* en, DOMÈNECH, Xavier, “El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo. Revisado” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*, pp. 48-81.

²⁴⁷ Tomamos aquí *prestado* el concepto esbozado por, MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere, “El partido del antifranquismo (1956-1977)” en BUENO LLUCH, Manuel, HINOJOSA, José y GARCÍA GARCÍA, Carmen (coords.), *Historia del PCE...*, *op.cit.*, vol. II, pp. 13-32. De los mismos autores, id. y id., *Els anys del PSUC. El partit del antifranquisme (1956-1981)*, Barcelona, L’Avenç, 2010. Asimismo téngase muy presentes las últimas aportaciones de, ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, *El PCE y...*, *op.cit.*; TREGLIA, Emanuele, *Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero*, Madrid, Eneida, 2012.

²⁴⁸ VEGA, Rubén, “Cortocircuitos de la..., *op.cit.*. Del mismo autor véase también: id., “Los contextos de la acción sindical: franquismo, transición y democracia”, *Sociología del Trabajo*, n° 36, (1999), pp. 133-154.

²⁴⁹ Entre otras muchas obras que ha enfocado las múltiples y complejas cuestiones que se entrecruzan permanentemente en la cuestión de la ‘sociedad civil’, nos remitimos –sin ánimo ni posibilidad de exhaustividad– a las siguientes obras: KEANE, John, *Democracia y sociedad civil*, Madrid, Alianza, 1992; VALLESPÍN, Fernando, “Sociedad civil y «crisis de la política»”, *Isegoría*, n° 13, (1996), pp. 39-58; OLVERA, Alberto, *La sociedad civil: de la teoría a la realidad*, México D. F., El Colegio de México / Centro de Estudios Sociológicos, 2001. Obras colectivas de notable interés en este mismo sentido: VIDAL BENEYTO, José (dir.), *Hacia una sociedad civil global: desde la sociedad mundo*, Madrid, Taurus, 2003; y, SAUCA CANO, José Mª y WENCES SIMON, Mª Isabel (eds.), *Lecturas de la sociedad civil: un mapa contemporáneo de sus teorías*, Madrid, Trotta, 2007.

reconociera, planteara que “la lucha democrática surgió en España de forma espontánea, a partir de las necesidades y de las aspiraciones de la sociedad civil, y fue una manifestación orgánica de dicha sociedad”. Añadiendo,

«el pueblo estableció los contactos suficientes y encontró un espacio político suficiente para empezar a organizarse; y, debido en parte a dicho aislamiento y represión, fundaron unas organizaciones políticas *sui generis*, y descubrieron unas estrategias originales para ampliar los límites de la sociedad civil»²⁵⁰.

Unas afirmaciones *fuertes* que no encuentran acomodo con las últimas aportaciones historiográficas²⁵¹. Así pues, el movimiento obrero –otro tanto cabría decir de cualquier otra forma de *oposición colectiva* mínimamente organizada– según esta lectura sería una suma de activistas, que irían tejiendo sucesivamente redes personales. Y sólo a *posteriori* construirían las respectivas organizaciones. El propio Víctor Pérez Díaz, otro de los impulsores de este “paradigma”, unos años antes señalaría:

«Hay varios motivos para hablar de una tendencia (problemática) al protagonismo de la sociedad civil española. Primero, hay que recordar que el impulso fundamental para la salida del franquismo hacia la democracia liberal ha procedido de la sociedad civil. La erosión del régimen anterior tuvo lugar en el terreno de la sociedad [...]. Fueron las actuaciones de las gentes, como individuos, grupos organizados o movimientos sociales, no mediados o apenas mediados por partidos e instituciones políticas, las que crearon, tanto en la calle como en la vida cotidiana, un escenario donde el régimen autoritario tenía que aparecer cada vez más como una entidad anómala, que no podría sobrevivir a la muerte del general Franco. Naturalmente, en el momento crítico, una nueva clase política hubo de construir y articular el nuevo régimen, pero lo hizo bajo la presión vigilante de la opinión pública y siendo continuamente rectificada [...] o confirmada [...] por ella»²⁵².

²⁵⁰ FOWERAKER, Joe, *La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España*, Madrid, Arias Montano, 1990, pp. 21 y 23, respectivamente. El propio historiador se vería obligado a matizar esta misma afirmación unas líneas más adelante: «La lucha única era, en realidad, muchas, en muchos lugares y por muchos motivos; pero cada lucha aportó algo al proceso de construcción de la democracia, que muchas veces es imprevisto y siempre es disgregado. Más aún, este proceso no fue el resultado natural del descontento y la disidencia política individuales, latentes en la sociedad civil; requirió, más bien, una organización y un cálculo político continuados; de esta manera, la actividad política de la sociedad civil tuvo que estar apuntalada por sus redes personales, y apoyada por el descubrimiento de estrategias políticas eficientes, por parte de estas personas». Ibídem. Del mismo autor unos años más tarde, id., “«Corazones inquietos, cabezas intranquilas» el papel de las redes sociales en la construcción de la democracia en España” en CRUZ ARTACHO, Salvador y PONCE ALBERCA, Julio (coords.), *El mundo del...*, op.cit., pp. 235-256. Por su parte, José M^a Maravall ha mantenido la existencia de lo que denominó las ‘comunidades de resistencia’, cuya pervivencia debe estudiarse teniendo en cuenta, primero, la naturaleza del conflicto obrero durante la dictadura –«bajo el Franquismo las huelgas, tenían una connotación política, puesto que estaban definidas legalmente como actos de sedición y eran considerados un desafío al régimen, llevándose a cabo una fuerte represión contra ellas»;– y en segundo término, ha de considerarse atentamente el lento proceso de recambio generacional entre dos generaciones de militantes –«los grupos clandestinos tuvieron éxito en aquellas áreas que constituían comunidades proletarias sólidas o en el medio protector de las universidades, pero al mismo tiempo el desarrollo de la lucha sólo era posible si organizaciones políticas clandestinas estaban activas en dichos medios». MARAVALL, José M^a, *Dictadura y disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo*, Madrid, Alfaguara, 1978, pp. 79 y 257, respectivamente. Por lo demás, ténganse presentes las tesis de, VEGA, Rubén, “Entre la derrota y la renovación generacional. Continuidad y protesta social” en MATEOS, Abdón (ed.), *La España de...*, op.cit..

²⁵¹ Junto con los trabajos ya citados en *Presentación, nota 124* y los que se han citado y se citarán en este mismo capítulo: DOMÈNECH, Xavier, *Cambio político y...*, op.cit..

²⁵² PÉREZ DÍAZ, Víctor, *La primacía de...*, op.cit., pp. 10-11. Otros balances en, SUBIRATS, Joan (ed.), *¿Existe sociedad civil en España? Responsabilidades colectivas y valores públicos*, Madrid, Fundación Encuentro, 1999.

Una visión que, por lo demás, focaliza la formación de las raíces democráticas de la “ciudadanía española” a través de pequeñas luchas, que llegado el momento posibilitarían el triunfo de la transición a la democracia, sin apenas arbitraje de las organizaciones políticas y sindicales. Una *sospechosa espontaneidad* que mal casa con los hechos históricos de carácter represivo cada mejor conocidos y que, por tanto, imposibilitan dar verosimilitud a tal interpretación²⁵³. De hecho, en tales aproximaciones dicho *factor* apenas aparece referenciado. Ejemplo de lo anterior, han sido las numerosas referencias a las manifestaciones y acciones colectivas –lejos de interpretarse como un posible *conflicto* político y social al mismo tiempo– llevadas a cabo a favor de la “amnistía” de los presos políticos en los años centrales de la transición. Un repertorio de acciones encabezadas por la *sociedad civil* como termómetro para medir el papel protagonista de este sujeto colectivo en el proceso de cambio político²⁵⁴. Sujeto, generalmente, sin mayores especificaciones incluidos nombres y apellidos como si dentro de ese mismo actor político –sí, político– no estuviera liderado por personas y menos condicionado por estrategias políticas de la propia oposición al régimen franquista.

En todo caso, este modelo de explicación soslaya directamente dos cuestiones no menores. Primero, la conceptualización o naturaleza del franquismo como una dictadura marcadamente de clase²⁵⁵; y segundo, el papel desarrollado por la clase obrera y el nuevo movimiento obrero clandestino, que venían organizándose y reorganizándose así como protagonizando diversos y cíclicos episodios conflictivos en tanto los mismos constituirían la propia matriz de su existencia. Por no hablar de otras formas de disidencia relacionadas con la violencia política y que tal y como se está evidenciando tuvieron una mayor relevancia en los resultados finales que la generalmente otorgada²⁵⁶. A partir de aquí, habría que señalar,

²⁵³ Junto a la bibliografía que se maneja en el Capítulo 4 en las *nota 80*, *nota 181* y *nota 258*, consúltese aquí el trabajo colectivo de, ARÓSTEGUI, Julio (coord.), *Franco: la represión como sistema*, Barcelona, Flor del Viento, 2012; y, de forma concreta, JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos, “Una aproximación a la «policía política» del franquismo: la Sexta Brigada de Barcelona” en DOMÍNGUEZ RAMA, Ana (ed.), *Enrique Ruano. Memoria viva de la impunidad del franquismo*, Madrid, Editorial Complutense, 2011, pp. 197-215. Y un relevante estudio de caso en, MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso (coord.), *La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969*, Córdoba, Fundación de Estudios Sindicales de CCOO de Andalucía / El Páramo, 2011.

²⁵⁴ Véanse las tesis mantenidas por, AGUILAR, Paloma, *Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada*, Madrid, Alianza, 2008. Y también por, JULIÁ, Santos, “Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura” en id. (dir.), *Memoria de la guerra y del franquismo*, Madrid, Taurus, 2006, pp. 27-78. Una visión crítica de este relato en, ESPINOSA, Francisco, “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Generaciones y memoria...*, *op.cit.*

²⁵⁵ En primer lugar, una lectura clásica, en POULANTZAS, Nicos, *Las crisis de...*, *op.cit.*, y, en concreto, su aproximación a los ‘bloques de poder’ (aunque matizables en alguno de sus extremos) de las dictaduras fascistas y su estrecha relación con las oligarquías financieras. Por lo demás, conviene recordar una vez más el texto magistral de, FONTANA, Josep, “Introducción. Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo” en id. (ed.), *España bajo el franquismo*, Valencia, Crítica / Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, 1986, pp. 9-38. E igualmente, volvemos a lo que ha explicado una vez más por el economista Diego Guerrero: «La *economía franquista* era, primero, economía capitalista, y luego economía en el franquismo. Estructuralmente hablando, los objetivos, los actores y agentes económicos, las estructuras, las empresas, las relaciones de producción, los bancos, los trabajadores y los propietarios, hasta los protagonistas concretos, o sus hijos y nietos, sus padres y abuelos [...] todos eran los mismos que antes, y que después, del franquismo. Sobre todo, las leyes sistémicas de la economía eran las mismas que hoy: las capitalistas». GUERRERO, Diego, “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*

²⁵⁶ Ejemplo de ello, dejando de lado la historia de ETA y las organizaciones políticas ligadas a la misma [véase aquí, FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka, “Agur a las armas. EIA, Euskadiko Ezkerra y la disolución de ETA político-militar (1976-1985)”, *Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación*

asimismo, como tal enfoque citado no tiene presente el nodo básico del modelo de socialización –o si se prefiere del *proceso social de reproducción*– que se encuentra detrás, precisamente, de la *formación histórica* de la *nueva* clase obrera española bajo el franquismo a lo largo de este periodo histórico²⁵⁷: el trabajo en la fábrica o en otros espacios centrales de las relaciones capital-trabajo. Precisamente, el principal núcleo de socialización pero también de generación de una “cultura de clase democrática”. Señal de identidad medular de la oposición antifranquista. Así pues, serían las penosas condiciones laborales, junto con el sentimiento de explotación, la sumisión a las políticas paternalistas²⁵⁸ o la propia represión político-laboral en sus diversas manifestaciones, algunas de las causas que se encuentran detrás de la generación de una identidad obrera, y por extensión de una militancia y cultura militantes particulares. Elementos todos ellos previos a las relaciones o redes personales, y que enlazan, en buena medida, con el inicial debate teórico planteado en la primera parte de este estado de la cuestión.

La importancia que adquiere este *espacio de la clase* –que junto con la familia y el barrio complementan la *tríada* de los principales núcleos de socialización de este tiempo²⁵⁹– no es compatible con las categorías ni con los espacios vacíos en los que se mueven el “pueblo” y/o la “sociedad civil” para llevar a cabo una explicación razonada acerca de las fuerzas acumuladas

vasca, nº 33, (2010), pp. 55-96] es el caso de la izquierda radical en España cuyo balance bibliográfico es exiguo como lo certifican que sus principales referencias fueran publicadas a mediados de los años noventa: ROCA, José Manuel (ed.), *El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992)*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994; LAIZ, Consuelo, *La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995. Otro tanto se puede decir de cara a las organizaciones armadas de izquierda durante el franquismo en donde el caso del FRAP es quizás el más significativo de todos ellos. Véase al respecto, DOMÍNGUEZ RAMA, Ana, “Orígenes y conformación del Partido Comunista de España (marxista-leninista)” en BUENO, Manuel (coord.), *Comunicaciones del II Congreso de historia del PCE: de la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque Social*, 2007 [CD-ROM], y en concreto el trabajo de investigación inédito, DOMÍNGUEZ RAMA, Ana, *La “guerra popular” en la oposición al franquismo. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P.)*, trabajo de Tercer Ciclo, Universidad Complutense, 2006. Por lo demás, TERRÉS, Jordi, “La izquierda radical española y los modelos del Este: el referente albanés en la lucha antifranquista. El caso del PCE (m-l)”, *Ayer*, nº 67, (2007), pp. 159-167; 1968; o CAUSSA, Martí, “La LCR y la izquierda radical (1966-1975)”, *Viento del Sur*, nº 115, (2011), pp. 49-55.

²⁵⁷ Nos remitimos aquí a lo ya aludido acerca del debate que, entre otros, han sostenido, TÉBAR, Javier, “La clase trabajadora en la «Gran Barcelona», 1951-1988. Reflexiones para el debate» en id., (ed.), *El movimiento obrero...*, *op.cit.*; DOMÈNECH, Xavier, “La formación de..., *op.cit.*; o, VEGA, Rubén, “Entre la derrota y la renovación generacional. Continuidad y protesta social” en MATEOS, Abdón (ed.), *La España de..., op.cit.*

²⁵⁸ Un trabajo de referencia en, BABIANO, José, *Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958)*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998, en especial el capítulo VI, “El funcionamiento del dispositivo paternalista” (pp. 155-178). Como destaca el mismo historiador la, «cuestión del paternalismo industrial no se redujo a un mero programa [...] [tampoco] se redujo a sus aspectos simbólicos o rituales. Se articularon verdaderas políticas asistenciales de esa naturaleza; es decir, basadas en la discrecionalidad, fundamentada en criterios morales y destinadas a generar consentimiento. La novedad residía en los nuevos objetivos derivados de la instauración del taylorismo». *Ibidem*, p. 187. Un *paternalismo*, sin salirnos del caso, madrileño que también puede observarse en, CAPRARELLA, Marcello, *Madrid durante el franquismo: crecimiento económico, política de imagen y cambio social*, Madrid, Consejo Económico y Social. Comunidad de Madrid, 2001. Y desde una perspectiva jurídica: SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente, *Nacional sindicalismo y relación de trabajo: la doctrina nacionalsindicalista de la “relación de trabajo” y sus bases ideológicas*, Madrid, Akal, 1982; y más recientemente, DOMÍNGUEZ ARÍAS, Ángel, “Evolución del ordenamiento jurídico-laboral en el franquismo y en la transición política” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delinquentes políticos...*, *op.cit.*, pp. 184-235.

²⁵⁹ Véase, aquí, buena parte de los trabajos contenidos, primero, en TÉBAR, Javier (ed.), *El movimiento obrero...*, *op.cit.*, así como lo apuntado, previamente, en la *nota 171*.

por la oposición antifranquista. Ni mucho menos en lo que se refiere a la formación de una cultura política democrática²⁶⁰.

Al contrario, serían los *productores* a partir de los conflictos concretos en sus centros de trabajo –que terminarían convirtiéndose en *verdades escuelas de formación* de activistas– los generadores de unas redes sociales –antes que personales– quienes, paso a paso, extenderían sus demandas y sus reivindicaciones en un espacio público que iría agradándose gradualmente no sin dificultades y retrocesos, pero sobre todo, insistimos, sometidos al control y represión del aparato represivo franquista como vehículo para garantizar la propia supervivencia del régimen²⁶¹. Ahí están las *asambleas* de obreros que llegarían a ser más que un “método de organización. Eran el estricto resultado de una larga experiencia de autoorganización de comunidades propiamente obreras”²⁶². Todo lo cual incluyó, a su vez, un complejo proceso de aprendizaje junto con la “generalización de usos democráticos en los centros de trabajo”²⁶³. He aquí que nos hemos topado con la temida *bajada al grupúsculo de la clase obrera*.

Una experiencia histórica marcada por una actividad clandestina e ilegal, que terminaría por generar –ahora sí– una *red de redes* de solidaridad que se encuentra en la misma base de la configuración de una militancia obrera antifranquista. Solidaridad que, “expresa la existencia de una conciencia de clase como el reconocimiento colectivo de pertenencia a un grupo propio con intereses, valores, culturas y proyectos diferenciados, y a veces opuestos a otros grupos sociales”²⁶⁴. Recuérdese, además, un dato que suele pasar desapercibido: la clase obrera nunca fue tan numerosa como en el franquismo²⁶⁵.

El *enfoque* de la “sociedad civil”, por tanto, acaba situando al *pueblo* y/o la *ciudadanía española* como categorías *a priori* antes del análisis propiamente histórico. De lo que se concluye, o debería concluirse, que antes de poder hablar de “pueblo”, de la “sociedad civil” o

²⁶⁰ Junto con lo apuntado en el apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinares” consúltese también los datos manejados en el Capítulo 4, *nota* 559. Por lo demás, otras referencias centrales para el caso que nos ocupa en: LÓPEZ PINA, Antonio y ARANGUREN, Eduardo L., *La cultura política española. Del franquismo a la democracia*, Madrid, Taurus, 1976; y, MORÁN, M^a Luz y BENEDICTO, Jorge, *La cultura política de los españoles: un ensayo de reinterpretación*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995.

²⁶¹ Nos remitimos a lo apuntado en la *nota* 253.

²⁶² RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El gobierno imposible. Trabajo y fronteras en la metrópolis de la abundancia*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2003, p. 39. Autor que reivindica la *centralidad del conflicto obrero*: «El conflicto fue, desde el primer momento, un pulso, que tenía implicaciones de orden mayor. En el tramo final de las luchas sociales se podía decir que estaba en juego todo el campo de las condiciones de existencia, desde el salario hasta el territorio, desde la reproducción de la fuerza de trabajo hasta el vigor y la consistencia cultural de estas comunidades». *Ibídem*.

²⁶³ SOTO CARMONA, Álvaro, “Huelgas laborales en el franquismo: causas laborales-consecuencias económicas”, *Historia Social*, n^o 30, (1998), p. 43. La extensión y generalización del ‘conflicto obrero’ terminaría por «trasladarse fuera de la fábrica» lo que llevaría a «[l]a constitución de redes de solidaridad durante las huelgas que tiende a generalizarse, convirtiéndose en una forma de reclutamiento para las organizaciones ilegales». *Ibídem*, p. 60.

²⁶⁴ DOMÈNECH, Xavier, “El problema de la conflictividad bajo el franquismo: saliendo del paradigma”, *Historia Social*, n^o 42, (2002), p. 138.

²⁶⁵ «Nunca la clase obrera había sido tan numerosa y es en sus actitudes y acciones donde se encuentra parte de la clave de la comprensión de la dinámica social y política española en este período». *Id.*, “La otra cara del milagro español. Clase obrera y movimiento obrero en los años del desarrollismo” en PÉREZ PÉREZ, José Antonio (coord.), *Desarrollismo, dictadura y...*, *op.cit.*, p. 92. Y más adelante este autor afirmaba: «[r]edes obreras desde las cuales se generaban elementos de identidad y solidaridad que posibilitaban la emergencia de una cultura comunitaria relativamente independiente del resto de culturas sociales. Nuevas formas de identidad que además fueron reforzadas por la homogeneidad social imperante en los nuevos barrios». *Ibídem*, p. 96.

de los “pequeños activistas” como (supuestos) vectores de la oposición antifranquista en abstracto; resulta más lógico interrogarse por sus condiciones sociales y de clase, junto con los procesos de toma de conciencia de clase y/o de identidad social. Procesos que, a la postre, posibilitaron la formación de decenas de organizaciones ilegales que, en mayor o en menor medida, extenderían sus estrategias y actuaciones al resto de la sociedad hasta alcanzar a importantes sectores profesionales, culturales e intelectuales que dieron voz y forma a esa misma oposición antifranquista²⁶⁶.

Una apuesta por la sociedad civil que termina coincidiendo, en gran medida, con otras lecturas y paradigmas, que han tendido a situar a la figura del “pueblo” en el primer plano del cambio político. Aunque fuera por otras razones e intereses²⁶⁷. Lecturas estas últimas que insisten, más allá del escaso papel otorgado a las organizaciones políticas-sindicales, en cómo serían, precisamente, los cambios sociales, culturales, económicos... producidos por la “modernización” del aparato productivo franquista²⁶⁸, los que a su vez establecerían las bases de una ciudadanía democrática. Y a partir de ahí, cómo no, aparecía una “clase media” de aires modernizadores y democráticos, aunque, eso sí, sin base empírica ni datos estadísticos de por

²⁶⁶ Sobre los diferentes puntos de origen del movimiento obrero, sus diversas estrategias de lucha y sus niveles de desarrollo, y los debates que han ido surgiendo, véase, junto con lo apuntado en el Capítulo 4, *nota 50*, el estudio pormenorizado que se planteó en su momento en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delinquentes políticos...*, *op.cit.*

²⁶⁷ El conjunto de lecturas al que hacemos referencia han mantenido con vehemencia las *virtudes* del crecimiento económico del franquismo –dentro a su vez de una *lectura liberal* de la historia económica– con la correspondiente –a modo de casi lectura automática sin mayores contradicciones– moderación de la ciudadanía a nivel político, laboral, social... Un relato que tiene por fundamento la tesis de la aparición de una *nueva clase media* en estos mismos años, y que, al parecer, tal acontecimiento –aunque poco se diga de su *formación histórica* ni menos de sus características y rasgos o posibles identidades tal y como sucede con la *clase obrera*– se convertiría en sí mismo –aunque tampoco mucho se hable de ella en los diferentes procesos de movilización y contestación al régimen– en un factor explicativo de primer orden para entender y comprender los mismísimos resultados finales del proceso de cambio político. Según esta misma *lectura* el ‘drama histórico’ del régimen habría sido el de engendrar en su devenir las ‘necesarias’ condiciones socio-políticas para la formación de una generación ciudadana democrática. MARAVALL, José M^a, *La política de...*, *op.cit.* Asimismo el mismo autor en otra conocida obra afirmaría: «El Franquismo es un caso importante en tanto que se trató de una dictadura que, según sus propios criterios, alcanzó un alto grado de éxito. Una represión aparentemente contradictoria y una mayor tolerancia ideológica parecen haber sido el resultado de una ‘normalidad’ fortalecida y consolidada, de la estabilidad de un orden económico y social». Añadiendo, «[e]stas contradicciones del sistema habrían creado nuevas condiciones objetivas para el cambio y el conflicto de carácter social y político». Id., *Dictadura y disenso...*, *op.cit.*, pp. 28 y 126, respectivamente. Véanse aquí también: JULIÁ, Santos, “Obreros y sacerdotes: cultura democrática y movimientos sociales de oposición” en TUSELL, Javier ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (coords.), *La oposición al régimen de Franco: estado de la cuestión y metodología de la investigación: Actas del Congreso Internacional organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED*, Madrid, UNED, 1990, pp. 147-161; MCDONOUGH, Peter, BARNES, Samuel y LÓPEZ PINA, Antonio, *The cultural dynamics of democratization in Spain*, New York / London, Cornell University Press, 1998; JULIÁ, Santos, “Cambio social y cultura política en la transición a la democracia” en MAINER, José Carlos y id., *El aprendizaje de la libertad, 1973-1986: la cultura de la transición*, Madrid, Alianza, 2000, pp. 15-77. Un último y clarificador ejemplo de tales *tesis* se pueden localizar en, TOWSON, Nigel (coord.), *España en cambio: el segundo franquismo, 1959-1975*, Madrid, Siglo XXI, 2009. Véanse dentro del citado volumen: CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio, “Orden, progreso y sindicalismo: cómo vieron las autoridades franquistas el cambio socio-económico” (pp. 87-102); y, PALOMARES, Cristina, “Nuevas mentalidades políticas en el tardo-franquismo” (pp. 103-128).

²⁶⁸ Nos remitimos aquí a la primera parte del apartado “6.1. Las condiciones objetivas vs subjetivas del trance modernizador”.

medio”²⁶⁹. Ello a pesar de la *contradicción inevitable* o *consecuencia no deseada* para la propia dictadura, que en su devenir generaría una ciudadanía democrática en un régimen autoritario. Una explicación, por cierto, bastante exigua en su razonamiento. En tanto está por demostrar aún la citada conexión entre la supuesta causa –modernización del aparato productivo– y el supuesto efecto directo –nacimiento de una cultura democrática entre la ciudadanía y/o el pueblo–. Y lo que no es menos importante: su relación directa con el cambio político y social.

Así pues, estamos ante modelos de explicación dispares pero coincidentes en parte de sus conclusiones. Tesis, remarcamos, que sitúan la cuestión de la organización obrera y el conflicto capital-trabajo como un elemento secundario, a la hora de interpretar los hechos históricos que posibilitaron la *transición posfranquista*. Lo que elimina, a su vez, la posibilidad de analizar el fin de la dictadura a través de los parciales “éxitos” alcanzados por la oposición antifranquista organizada, relegando a ésta a una “pequeña minoría de líderes espontáneos que aparecían «cuando hacían falta»”²⁷⁰. Una explicación que como es evidente resulta complicada de mantener, y de ahí en parte su escaso recorrido en nuestra historiografía.

Por el contrario, los movimientos sociales han encontrado un mayor acomodo dentro de la historiografía²⁷¹. El propio movimiento obrero ha sido incluido, en no pocas ocasiones, dentro de los movimientos sociales. Como uno más. Sin distinción. Una falta creciente de autonomía historiográfica que, en pleno proceso de “des-ideologización” de las ciencias sociales, ha llegado a configurar en el seno de la *academia* una imagen estereotipada: movimientos sociales como modernización historiográfica; movimiento obrero como involución y retraso. Una imagen que hoy permanece incrustada en no pocos investigadores, quienes en su *noble* proyecto de renovar la historia social superando así la *supuesta* primacía obrerista –que nunca fue hegemónica ni total incluso a finales de los setenta– han tratado de reelaborar y reescribir el relato de lo social. Un relato que ha pretendido *tomar* por centro a *los de abajo* a través del globalizador concepto de los movimientos sociales. Resultado de lo anterior –como adelantáramos– ha sido identificar, en no pocos casos, a estos mismos *movimientos sociales* como los principales impulsores del “cambio político”. Una hipótesis que sigue estando abierta a diversos pareceres.

Cierto es que los propios movimientos sociales hasta la “segunda ruptura” y durante los años ochenta, fueron sujetos históricos desplazados de los grandes relatos que aquí se

²⁶⁹ Véase la nota 267.

²⁷⁰ FOWERAKER, Joe, *La democracia española...*, *op.cit.*, p. 24. Y especificaba a continuación: «estos activistas sólo eran eficaces cuando se encontraban entre sí, y dado que se asociaban con relaciones estrechas y complejas, formaron redes personales que reforzaron las organizaciones políticas incipientes, y ampliaron la gama de viabilidades políticas. Estas redes fueron un elemento clave de la oposición popular a Franco». *Ibidem*. Una visión que se cae por su propio peso cuando se comprueba, sencillamente, las técnicas de organización y clandestinidad que aplicaría la militancia comunista durante dichos años, y que a la postre les permitió liderar la lucha contra el régimen. Así pues, y junto con la bibliografía ya apuntada en páginas anteriores, véanse, DOMÈNECH, Xavier, “Cenizas que ardían todavía: la identidad comunista en el tardofranquismo y la transición” (pp. 93-138); ERICE, Francisco, “El «orgullo de ser comunista». Imagen, autopercepción, memoria e identidad colectiva de los comunistas españoles” (pp. 139-183)”, ambos en, BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (eds.), *«Nosotros los comunistas»...*, *op.cit.*. Y asimismo: ASOCIACIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA Y DE LA JOVEN GUARDIA ROJA, *PTE, la lucha por la ruptura democrática en la Transición*, Madrid, Asociación por la Memoria Histórica del Partido del Trabajo de España y de la Joven Guardia, 2010. Por último, GARCÉS, Mario, “Actores y disputas por la memoria en la transición siempre inconclusa” en GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen y NICOLÁS MARÍN, Encarna (eds.), *Procesos de construcción de la democracia en España y Chile*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 79, (2010), pp. 147-169.

²⁷¹ Véase la amplia bibliografía apuntada en la nota 194. Conjunto de títulos a los que habría que añadir la obra de, TEJERINA, Benjamín, *La sociedad imaginada: movimientos sociales y cambio cultural en España*, Madrid, Trotta, 2010.

cuestionan. En todo caso, de ahí a la encumbrada importancia de los movimientos sociales media un paralelismo científico poco fundamentado hasta el momento. Un paralelismo que ha carecido hasta ahora de una explicación sostenida, más allá de resaltar las limitaciones e imposibilidades reales de la oposición antifranquista. Contribuyendo también de esta manera, directa o indirectamente, al reforzamiento de la narración hegemónica.

Pero volviendo a lo que nos interesa destacar, si *hipotéticamente* fueron los movimientos sociales los principales protagonistas de la movilización –como en parte se puede observar a través de los movimientos vecinales como se explicó previamente²⁷²– y quienes ocuparon la calle, los espacios públicos o de sociabilidad... durante el franquismo, y el movimiento obrero si bien no fue marginal si estaría en una posición secundaria ante el protagonismo *liderado* por el “pueblo” o la “ciudadanía”; esta particular visión cargada de fuerte dosis de *culturalismo* y *anti-economicismo* tiene una *otra lectura*. Una lectura que aunque no se especifique puede intuirse, en nuestra opinión, sin dificultades: la ausencia de consecuencias directas derivadas, en su caso, de un acentuado conflicto capital-trabajo generalizado a mediados de los setenta como motor de las principales movilizaciones sindicales y político-sociales acaecidas. O al menos, habría que matizar que este asunto no figura entre las preocupaciones principales de estas líneas de investigación.

Pues bien, este particular emplazamiento de los actores protagonistas y de sus motivos de su protesta –que normalmente tienen un componente cultural antes que laboral, según esta misma lectura– no explica una de las raíces estructurales de cambio político-social: la crisis del sistema capitalista franquista como *quiebra* de la fase de acumulación del capital a partir de los años setenta del siglo XX²⁷³. Asimismo tampoco tiene presente como la creciente desestabilización del sistema político derivado del incremento de las luchas obreras, que conceptualizadas o no como lucha de clases, estuvieron en la misma raíz del “empate” en lo que se refiere a la correlación de fuerzas entre el franquismo y la oposición antifranquista a la muerte del dictador. Es decir, el modelo anterior no examina adecuadamente el equilibrio alcanzado entre ambas fuerzas históricas a mediados de los setenta, en donde ni la una ni la otra podían imponer su proyecto sin contrapartidas ni riesgos difícilmente asumibles por ambas partes.

A todo esto se suma un aspecto no menor. La narración hegemónica –como de uno de los mecanismos de consenso, por excelencia– en su proceso de adaptación a los tiempos históricos, y ya en pleno régimen democrático, ha sabido combinar dos grandes explicaciones, sin aparentes contradicciones, a través de una lectura sesgada del papel jugado por “los de abajo”. La primera vía, a pesar de destacar el protagonismo del “pueblo español” y la “ciudadanía”²⁷⁴ –*Los españoles consiguen poner en pie la Democracia*, ha sido uno de sus últimos lemas²⁷⁵– y de algunos movimientos sociales –por ejemplo, el movimiento feminista

²⁷² Véase lo apuntado en la *nota 196* y siguientes.

²⁷³ Nos remitimos aquí al apartado “6. 1. Las condiciones objetivas vs subjetivas del trance modernizador”.

²⁷⁴ Junto con lo apuntado en la *nota 45* y otras, y ya alejados de la construcción del relato canónico de la transición, numerosas han sido las investigaciones que han venido aportando no pocos trabajos de una alta calidad. En primer lugar, han sido determinante aquellos análisis que se han preguntado por los propios ‘significados’ del movimiento obrero durante nuestra historia contemporánea y en concreto a lo largo del franquismo –CRUZ, Rafael, “El órgano de...”, *op.cit.* –; en segundo lugar, debe resaltarse el papel que ha adquirido el examen de la *ciudadanía* y el *pueblo* –BENEDICTO, Jorge, “Ciudadanos, ciudadanía y cultura democrática” en PÉREZ LEDESMA, Manuel (dir.), *De súbditos a...*, *op.cit.*, pp. 373-405; y tercero sobre el empleo de estos conceptos véase, MIGUEL GONZÁLEZ, Román, *La pasión revolucionaria. Culturas políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo XIX*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

²⁷⁵ Título del primer volumen de una colección del periódico *El Mundo* en 2008 –“El camino de la libertad (1978-2008). La democracia año a año”– publicada para conmemorar el 30º Aniversario de la

incluido aquí la formación de plataformas y asociaciones encabezadas e impulsadas por las mujeres antifranquistas en pleno régimen dictatorial, aunque su propia lectura diverja necesariamente de los grandes consensos historiográficos²⁷⁶ – la misma ha estado enfocada, ante todo, a afianzar, ampliar y consolidar las bases de su legitimidad popular del citado *paradigma explicativo*. Por este camino se ha vaciado de contenido histórico a las luchas y conflictos protagonizados por estos mismos sujetos. Mientras que en paralelo –segunda vía– se ha sostenido la tesis de la “debilidad de la oposición al régimen” con el fin de justificar la nueva correlación de fuerzas que se establecería al final de la transición a la democracia. En todo caso como explicó tempranamente Pere Ysàs esta última tesis encaja mal a “la luz de los conocimientos acumulados por la historiografía sobre la época franquista”. Aportando este mismo historiador una *lectura alternativa* en torno a las causas de la crisis del régimen franquista, que viene a señalar como el *disenso* –que tuvo al movimiento obrero organizado por uno de sus ejes centrales– ha sido infravalorado para explicar la crisis del régimen:

aprobación de la Constitución. Colección que resume todos los tópicos y mitos característicos del ‘modelo canónico de la transición’. Recuérdese asimismo la célebre emisión en Televisión Española, a mediados de los noventa, de la serie documental titulada *La Transición* dirigida por Elías Andrés y Victoria Prego. Una serie que ayudaría a forjar en buena parte de la sociedad, y especialmente en las generaciones en formación, los tópicos hoy en discusión. Sobre todas estas cuestiones nos hemos detenido en profundidad en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Presentación. La «memoria democrática» como conflicto” en id. (coord.), *La memoria como..., op.cit.*.

²⁷⁶ En torno a esta cuestión véanse, entre otros, algunos estudios sobre el movimiento feminista publicados en su momento –MORENO, Amparo, *Mujeres en lucha: el movimiento feminista en España*, Barcelona, Anagrama, 1977– junto con últimas aportaciones de enorme interés en obras como: AUGUSTÍN PUERTA, Mercedes, *Feminismo, identidad personal y lucha colectiva (análisis del movimiento feminista español en los años 1975 a 1985)*, Granada, Universidad de Granada, 2003; BABIANO, José (ed.), *Del Hogar a..., op.cit.*; MARTÍNEZ TEN, Carmen, GONZÁLEZ RUIZ, Pilar y GUTIÉRREZ LÓPEZ, Purificación (eds.), *El movimiento feminista en España en los años 70*, Madrid, Cátedra, 2009; EGIDO LEÓN, Mª de los Ángeles y FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana (eds.), *Ciudadanas, militantes, feministas: mujer y compromiso político en el siglo XX*, Madrid, Eneida, 2011; AGUADO, Ana y ORTEGA, Teresa Mª (eds.), *Feminismos y antifeminismo: culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX*, València / Granada, Universitat de València / Universidad de Granada, 2011. Y desde una perspectiva a largo plazo: FOLGUERA, Pilar (coord.), *El feminismo en España: dos siglos de historia*, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2007. Y en relación a la segunda cuestión apuntada, la bibliografía acumulada hasta el momento en este campo está permitiendo reequilibrar la histórica situación discriminatoria mantenida hacia la mujer disidente. Desde recientes investigaciones como las de Irene ABAD en torno a las ‘mujeres de preso’ y el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) –*Las mujeres de los presos políticos. Represión, solidaridad y movilización en los extramuros de las cárceles franquistas, 1936-1977*, Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 2007 [publicada en, *Las puertas de la prisión. De la solidaridad a la conciencia política de las mujeres de los presos del franquismo*, Barcelona, Icaria, 2012]– existe, por lo demás, un consolidado conjunto de referencias sobre la mujer y el ‘mundo del trabajo’ durante el franquismo: BORDERÍAS, Cristina, *Entre líneas: trabajo e identidad femenina en la España contemporánea. La compañía Telefónica, 1924-1980*, Barcelona, Icaria, 1993; BORDERÍAS, Cristina, CARRASCO, Cristina y ALEMANY, Carme (comps.), *Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales*, Barcelona, Icaria, 1994; BORDERÍAS, Cristina y HURTADO, Javier (coords.), *Dones, treball i sindicalisme a Catalunya, 1939-1978*, III vols., Barcelona, Arxiu Històric de la CONC, 1999; VILLAR, Concepción, “Recuperar y repensar la memoria de las mujeres sobre la experiencia sindical”, *Arenal*, vol. VIII, nº 1, (2002), pp. 155-175; NIELFA CRISTÓBAL, Gloria (ed.), *Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política, cultura*, Madrid, Universidad Complutense, 2003; FEBO, Giuliana di, “Resistencias femeninas al franquismo. Para un estado de la cuestión”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 28, (2006), pp. 153-168; NASH, Mary, *Dones en transició. De la resistència política a la legitimitat: les dones en la Barcelona de la Transició*, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, entre otros muchos posibles. Un reciente estado de la cuestión en, PÉREZ FUENTES, Pilar, “Women in the Workplace in Nineteenth and Twentieth-Century Spain: Methodological Considerations” en PIQUERAS, Juan Antonio y SANZ, Vicent (eds.), *A social history..., op.cit.*, pp. 43-63.

«El silencio y la aparente indiferencia política de amplios sectores de la sociedad española no pueden confundirse con el apoyo del régimen, ni explicarse satisfactoriamente sin tener en cuenta el extenso y persistente miedo que en sus primeros años la dictadura logró inocular en el cuerpo social y que alimentó hasta su final precisamente para disuadir a reales y potenciales opositores y disidentes. Por otra parte, el disenso, en sus variadas expresiones, es decir, desde el rechazo pasivo hasta la oposición activa, estuvo presente de forma continua en la sociedad española y, en especial, desde finales de la década de los años cincuenta. Además, a lo largo de los años sesenta y en la primera mitad de los setenta, el disentimiento hacia el régimen franquista creció de forma continuada hasta convertirse en un factor decisivo de la vida política»²⁷⁷.

El anterior conjunto de interpretaciones han reforzado, en suma, la tradicional “visión elitista” del cambio político de la transición²⁷⁸. Un relato que en su continúa reelaboración y adaptación se ha cuidado mucho a la hora de seleccionar y promocionar por ende, a los actores centrales que explicarían la llegada de la democracia. Todo ello a través del establecimiento de una narración única –con un claro sesgo *de clase*– que ha dado paso a la formación de un “nuevo panteón” convertido en poco tiempo en todo un “santoral laico”²⁷⁹. Ejemplo de lo aquí mencionado son los llamados “fundadores” y/o “padres” de la transición. Vinieran éstos del anterior régimen, de sus proximidades (con pasados en muchas ocasiones con escasa raigambre democrática) o en el mejor de los casos provenientes de la oposición democrática.

Nos encontramos, pues, ante la “invención de una tradición democrática”²⁸⁰. Una lectura del *cambio político desde arriba* que parapetada tras las teorías de la modernización²⁸¹, y del liderazgo de una burguesía democratizadora al compás del desarrollismo económico

²⁷⁷ YSÀS, Pere, *Disidencia y subversión...*, *op.cit.*, p. X.

²⁷⁸ Un claro ejemplo –aunque decenas se podrían citar– de este tipo de lectura en, PALOMARES, Cristina, *Sobrevivir después de Franco. Evolución y triunfo del reformismo, 1964- 1977*, Madrid, Alianza, 2006. Investigadora quien ya en la propia introducción plantea las bases de la ‘idealizada’ transición: «La voluntad del rey de cometer una reforma integral del régimen franquista y su deseo de no oponerse a la inminente llegada de la participación popular fueron, sin duda, algunos de los factores fundamentales que hicieron posible el éxito de un proceso de transición a la democracia que se caracterizó por su moderación». Adjudicando al final de su obra a «[l]os políticos moderados que formaban parte del régimen de Franco [...] [el] factor esencial para el éxito de la transición democrática en España». *Ibidem*, pp. 19 y 301, respectivamente. Una lectura crítica acerca de estos mismos tópicos en, OÑATE, Pablo, *Consenso e ideología en la transición española*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

²⁷⁹ CHIRBES, Rafael, “De qué memoria hablamos” en MOLINERO, Carme (ed.), *La transición...*, *op.cit.*, pp. 238-239. Y concluía el mismo autor: «El fenómeno tuvo carácter formativo y duró lo suficiente para que esas capas burguesas pudieran construirse el soporte de su narración, de su epopeya, y no se prolongó más allá de lo imprescindible. La memoria llevada a sus últimas consecuencias amenazaba los fundamentos del nuevo régimen: la legitimidad de la propia monarquía, buena parte del sistema de propiedad [...]. Se necesitaban nuevos héroes para una nueva epopeya». *Ibidem*.

²⁸⁰ Véase de nuevo, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «memoria democrática» como conflicto” en *id.* (coord.), *La memoria como...*, *op.cit.*, p. 16. Un proceso observado en otros casos históricos –aunque desde otras perspectivas e intereses– en, HOBSBAWM, Eric J. y RANGER, Terence (eds.), *La invención de la tradición*, Barcelona, Crítica, 2002, y dentro de ese mismo volumen, HOBSBAWM, Eric J., “Introducción: la invención de la tradición” (pp. 7-21); y FONTANA, Josep, *La historia de...*, *op.cit.*. Para el caso concreto que nos ocupa, PÉREZ DÍAZ, Víctor, “La emergencia de la España democrática” en *La primacía de...*, *op.cit.*, pp. 15-73; y del mismo autor, *id.*, “La emergencia de la España democrática: la «invención» de una tradición y la dudosa institucionalización de una democracia”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 18, (1991). E igualmente véase el conocido trabajo de, ANDERSON, Benedict R. O’G., *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*, New York / London, Verso, 1994 [1991].

²⁸¹ Remitimos a lo ya apuntado en el capítulo “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinares”.

franquista²⁸², ha tenido una larga trayectoria y un notable éxito. Una macrovisión que encaja a su vez con la actual correlación de fuerzas entre capital-trabajo²⁸³. Un relato que es parte sustancial de la ideología de la clase dominante de ayer y hoy en el poder. De hecho, entre las causas que ayudan a entender y explicar esta particular *historia de un éxito*, José M^a Maravall apuntó hace un largo tiempo una posible explicación en esta misma dirección: los escasos “intentos de explicar el proceso de transición hacia la democracia en España desde la perspectiva de la composición y la política de la clase dominante”²⁸⁴.

Las circunstancias, causas y variables para explicar esta falta de interés son múltiples. No obstante, sí parece oportuno destacar la pervivencia de ciertas reticencias instaladas con fuerza dentro de la propia academia, a la hora de indagar por los cimientos y bases del nuevo régimen democrático de mercado. De ahí que con demasiada frecuencia se entendiera que examinar el cambio de régimen desde estos postulados, pudiera conducir a un cuestionamiento directo de un modelo de transición rápidamente canonizado. En todo caso, esta historia elevada a los *altares* de lo que debe ser un cambio de régimen político²⁸⁵ no puede entenderse si no partimos de un hecho histórico: el no cuestionamiento del modelo económico y social heredado del franquismo. Y con él, de sus principales valedores. A lo que se suma un acontecimiento anterior en el tiempo de no menores consecuencias: la estrecha ligazón entre la clase dominante y la dirigencia de la intentona golpista, incluso antes de la preparación del golpe militar finalmente ejecutado el 18 de julio de 1936²⁸⁶. Una estrategia y una política de alianzas entre el franquismo y la clase dominante que se mantuvo vigente durante todo el periodo con algunos episodios esenciales para su mantenimiento: desde la financiación del golpe²⁸⁷ o la propia la

²⁸² Dos obras en esta línea en, CARR, Raymond y FUSI, Juan Pablo, *España: De la dictadura a la democracia*, Barcelona, Planeta, 1979; y POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*. En cualquier caso, ha de tenerse más que presente la influencia tanto *ideológica* como *metodológica* al respecto de, LINZ, Juan José, *Crisis, breakdown and...*, *op.cit.*, vol. I; y, id., “La transición a la democracia en España en perspectiva comparada” en COTARELO, Ramón (comp.), *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992, pp. 431-459. Por lo demás, véase la *nota* 267.

²⁸³ Una inteligente crítica con respecto a este siempre recordado ‘éxito’ la encontramos en, MOLINERO, Carme, “Treinta años después. La Transición revisada” en id. (ed.), *La Transición...*, *op.cit.*, quien ha afirmado: «Ese mismo ‘éxito’ ha contribuido a la dulcificación de las percepciones dominantes sobre la Transición de la dictadura a la democracia, que fue difícil y compleja. Con el paso del tiempo se ha ido fijando en el imaginario de amplios sectores de la sociedad una ligazón casi automática entre la muerte de Franco y la instauración de la democracia. A poco que se invite a una explicación argumentada del proceso, cualquier persona mínimamente informada introducirá matizaciones en ese encadenamiento simplificador». *Ibidem*, p. 9.

²⁸⁴ MARAVALL, José M^a, *La política de...*, *op.cit.*, p. 19. Sobre esta cuestión se volverá con detenimiento en diferentes apartados del Epígrafe “II. La conquista del poder político del socialismo español: la *misión histórica* del PSOE (1972-1982)”.

²⁸⁵ Una de las muchas revisiones sobre la manida ‘exportabilidad’ del modelo de transición español, eso sí con nuevos *matices* y *argumentaciones*, en, GUNTHER, Richard y MONTERO, José Ramón, *The politics of Spain*, New York, Cambridge University Press, 2009.

²⁸⁶ Al respecto, ARÓSTEGUI, Julio, *Por qué el 18 de julio: y después*, Barcelona, Flor del Viento, 2006. Todo ello junto con lo apuntado previamente en la *nota* 253.

²⁸⁷ Ilustrativo, en este sentido, han sido los recientes datos aportados en la biografía de Mercedes Cabrera sobre el empresario Juan March [CABRERA, Mercedes, *Juan March (1880-1962)*, Madrid, Marcial Pons, 2011]. Un ejemplo de trayectoria, entre otros centenares de ejemplos posibles, que han llegado hasta el presente inmaculados de toda ‘mancha’ de sospecha de pasadas relaciones con el fascismo. Significativo, en este sentido, es la buena imagen que conserva la propia Fundación Juan March con sede en Madrid. En la propia página web de la Fundación, y concretamente en la biografía de Juan March, se obvia toda relación con el franquismo [www.march.es]. Véanse también aquí: DÍAZ NOSTY, Bernardo, *La irresistible ascensión de Juan March: notas previas para una investigación biográfica*, Madrid, Sidmay, 1977; JIMÉNEZ, M^a Ángeles, *Juan March*, Madrid, Dersa, 1991; y los trabajos de,

“matanza fundacional del franquismo” con un claro contenido de clase²⁸⁸, pasando por la reordenación de la situación económica durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, hasta el posterior proceso de liberalización económica. La simbiosis entre la clase dominante y el régimen fue una realidad histórica desde incluso antes de la implantación de las *políticas de la victoria*²⁸⁹.

De ahí, que si bien a nivel político la correlación de fuerzas entre dictadura y oposición antifranquista presentaran un cierto “equilibrio” en plena crisis política; por el contrario, la clase dominante del país, apadrinada y beneficiada por el franquismo, iba a afrontar la transición

FERRER, Pere, *Juan March: los inicios de un imperio financiero*, Palma, Cort, 2001; y id., *Joan March: la cara oculta del poder (1931-1945)*, Palma, Cort, 2004

²⁸⁸ La expresión procede de Francisco Espinosa quien ha remarcado, además, como todavía la «matanza fundacional del franquismo sigue siendo tabú, tanto para una derecha que no ha roto con aquel régimen, del que surge, como para parte de una izquierda que asume sin problemas que ese asunto no debe tocarse. Olvidan quienes así piensan que lo que precisamente ha puesto en duda la transición ha sido saber lo que no sabíamos, lo que, como mucho, eran o datos genéricos o rumores. Lo que la investigación ha demostrado pacientemente a lo largo de veinticinco años y no con números que para todo valen, sino con nombres y apellidos es que ni la ‘guerra civil’ era inevitable ni todos fueron iguales. Fracasado el golpe inicial, la guerra civil convenía a los sublevados para *limpiar* a fondo el país y para cubrir con el manto justificador de barbarie que acarrea toda guerra, aquellos tiempos iniciales de represión salvaje a golpe de bando de guerra. La geografía de aquella masacre se superpone a la geografía del actual mapa de fosas». ESPINOSA, Francisco, “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Generaciones y memoria...*, op.cit.. Una *política de exterminio* que como ha demostrado el propio Espinosa en otras obras –*La columna de la muerte: el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz*, Barcelona, Crítica, 2003 o más recientemente en el conjunto de trabajos colectivos recogidos en, id. (ed.), *Violencia roja y azul: España, 1936-1950*, Barcelona, Crítica, 2010– que siguió un plan escrupulosamente elaborado y que sería ejecutado tanto a lo largo de la guerra civil como en los primeros años de la dictadura. El fin: eliminar al adversario político. El propio Francisco Espinosa en un balance cuantificador realizado en relación al proceso abierto por el juez Baltasar Garzón en septiembre de 2008 [Diligencias Previas 399/2006-E del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional] y cerrado rápidamente y sin resultados, calculaba al menos en 130.000 las víctimas de esta política exterminadora. Una cuantificación proyectada en un mapa aún incompleto de la represión a nivel de todo el país [véase, ESPINOSA, Francisco, *Informe de la represión franquista. Un estado de la cuestión*, septiembre de 2008 [www.todoslosnombres.org]]. Una realidad histórica calificada por organismos relacionados con los derechos humanos de ‘crímenes contra la humanidad’: EQUIPO NIZKOR, *La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas*, Madrid, 2004 [www.derechos.org]; AMNISTÍA INTERNACIONAL, *España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista*, Madrid, 2005 [www.es.amnesty.org]. Véanse, al respecto, recientes exámenes desde la perspectiva de la justicia transnacional en, CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier, *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: Hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana*, Madrid, Ediciones Parthenon, 2007; y, GARCÍA, Alejandro (ed.), *Los crímenes de estado y su gestión: dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la justicia penal internacional*, Madrid, Los Libros de Catarata, 2009. Y aquí también, ÑÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta (coord.), *La gran represión: los años de plomo de la posguerra (1939-1948)*, Barcelona, Flor del Viento, 2009; PRADA RODRÍGUEZ, Julio, *La España masacrada: la represión franquista de guerra y posguerra*, Madrid, Alianza, 2010; VEGA, Santiago, *La política del miedo: el papel de la represión en el franquismo*, Barcelona, Crítica, 2011; y, PRESTON, Paul, *El holocausto español: odio y exterminio en la Guerra Civil y después*, Barcelona, Debate, 2011, a sumarse con lo ya reseñado en la nota 253. Y, por último: ARAGONESES, Alfons, “El derecho bajo el franquismo. Transformaciones del sistema jurídico español (1936-1978)” en CAPELLÀ, Margalida y GINARD, David (coords.), *Represión política, justicia y reparación: la memoria histórica en perspectiva jurídica*, Palma (de Mallorca), Documenta Balear, 2009, pp. 123-159; e, PAGÈS i BLANCH, Pelai, *Les lleis repressives del franquisme (1936-1975)*, Valencia, Tres i Quatre, 2010.

²⁸⁹ Véase, CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio, *Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953)*, Madrid, Marcial Pons, 2000.

postfranquista desde una posición privilegiada²⁹⁰. Una posición de fuerza que, en la práctica, no sufriría desgaste alguno cuando no iba a resultar beneficiada. Tema que conecta con el primer punto de crítica que planteábamos: un proceso político *de cambio* que mucho tuvo *de reforma*, de transacción y continuidad y poco de ruptura. El resultado ha sido claro: si ya ha sido complicado cuestionar el paradigma oficial y hegemónico, la sola posibilidad de examinar, detenidamente, los lazos e intereses que unieron a la clase política con la clase dominante parece que tendrá que esperar aún un cierto tiempo.

Por lo demás, esta particular historia política encargada de la generación de los grandes relatos, con gran capacidad de transmisión de la ideología dominante, ha tenido un inmenso campo de actuación a través de diferentes vías. Un hecho que fuera ya advertido por Jean Chesneaux: “[e]l poder controla todavía el pasado de manera mucho más activa y directa. Funda su práctica política, su decisión, sus opciones en el pasado, sobre todo el más reciente [...]. Se trata de una «historia inmediata» del estado”²⁹¹. Sea como fuere, lo cierto es que hasta hace menos de una década con la implosión del movimiento social por la “memoria democrática”, junto con un proceso de lenta superación de determinadas inercias del pasado por parte de una historiografía comprometida con el esclarecimiento del pasado, este relato no había sido cuestionado frontalmente²⁹². Este cambio de rumbo y de orientación por cada vez una mayor parte de los investigadores, va ampliando y modificando nuestros ángulos de visión del franquismo y del antifranquismo. Una *particular transición historiográfica* que no sólo tiene por objetivo deshacer los mitos de la transición, sino que también se ha propuesto y profundizar en las dinámicas, tensiones y dimensiones que posibilitaron el cambio de régimen²⁹³.

En este contexto teórico a la par que empírico se presenta esta investigación por más que la misma abarque los años ochenta y los primeros noventa del siglo XX. Estamos, pues, ante nuestros antecedentes necesarios. Así pues, tres cuestiones con sus consiguientes ramificaciones, al menos, deben de remarcarse en este permanente cruce de lecturas, debates y de tiempos históricos. En primer lugar, partiendo de las enseñanzas acumuladas, a raíz de la renovación de la así denominada historiografía social clásica sobre el movimiento obrero, parece cuando menos conveniente retomar este tipo de estudios con cierta urgencia.

²⁹⁰ Nos remitimos aquí a todo lo apuntado en el Capítulo “4. La metamorfosis del PSOE: las contradicciones del *socialismo modernizador* (1972-1982)” así como en el Capítulo “6. La «revolución burguesa pendiente»: las vicisitudes de la *única política posible* y/o el síndrome NHA”.

²⁹¹ CHESNEAUX, Jean, *¿Hacemos tabla rasa...?*, op.cit., p. 33.

²⁹² Obra pionera en lo que se refiere a visiones críticas acerca de la transición en aquel momento todavía en marcha en, VIDAL- BENEYTO, José, *Del franquismo a...*, op.cit.. En todo caso, sería a partir de los noventa, pero con especial intensidad en esta última década, cuando la producción bibliográfica ha pasado de su carácter marginal inicial a un cada vez más consolidado proceso de normalización. Junto con lo apuntado a lo largo de los diferentes apartados del Capítulo 2 y en el Capítulo 4, *nota 76 y nota 258* entre otras, véanse aquí: MORÁN, Gregorio, *El precio de la transición. Una interpretación diferente y radical del proceso que condujo a España de la dictadura a la democracia*, Barcelona, Planeta, 1992; y, CAPELLA, Juan Ramón (ed.), *Las sombras del sistema constitucional español*, Madrid, Trotta, 2003; y, MONEDERO, Juan Carlos, *La transición contada a nuestros padres: nocturno de la democracia española*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011.

²⁹³ De notable valor es el reciente libro de, GALLEGU, Ferrán, *Los mitos de la transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia*, Barcelona, Crítica, 2008. Por lo demás véase el clarificador trabajo de, CASTELLANOS LÓPEZ, José Antonio, “De consensos, rupturas y nuevas historias: una visión de la transición desde la España actual” en GONZÁLEZ MADRID, Damián A. (coord.), *El franquismo y...*, op.cit., pp. 154-178. Obras que enlazan ya con una bibliografía creciente entre la que sobresale, de nuevo, fuera del ámbito historiográfico el trabajo de, VIDAL-BENEYTO, José, *Memoria democrática*, Madrid, Foca, 2007.

No se trata tanto de recuperar viejas preguntas en torno a la historia del movimiento obrero durante la última etapa del franquismo –a pesar de su pertinente validez– sino de interrogarnos desde que presupuestos podemos ampliar nuestro conocimiento sobre este periodo clave de nuestra contemporaneidad.

El camino recorrido por las nuevas líneas de investigación en su reconsideración del pasado ha sido de tal dimensión, que a las ya habituales ausencias de referencias acerca de los temas clásicos, se ha sumado un profundo cambio en lo que se refiere a los propios usos de las fuentes emanadas por las organizaciones del movimiento obrero²⁹⁴. Si las mismas –desde el *viejo paradigma*– eran empleadas con el fin de reconstruir la historia de las organizaciones y de sus protagonistas, ahora de forma cada vez más frecuente se utilizan con un planteamiento muy distinto. No se trata tanto de interpretar los acontecimientos históricos sino de acercarse a cómo los sujetos entienden su vivencia individual, su pensamiento –que no *ideología*– y un sin fin de cuestiones centradas en el examen de la identidad, valores y dado el caso los lenguajes.

La valía del documento ha cambiado en un sentido cualitativo. Si la historia, a fin de cuentas, son tantas historias como narraciones posibles –y en donde los hechos históricos pierden su papel como punto de arranque de cualquier debate y/o crítica– resulta más cómodo y menos problemático, por fuerza, indagar por los entresijos de la historia más que en sus procesos de cambio. De ahí que la certeza de antaño de que el análisis, contraste y verificación del documento nos podía acercar a la “verdad histórica” se haya progresivamente diluido²⁹⁵. Ya no se trata tanto de enmarcar la actuación de los sujetos históricos en un contexto determinado con sus correspondientes características y especificaciones. Ni menos de explicar sus interrelaciones en un tiempo histórico concreto. Por el contrario, el interés reside en lo que individuo o la suma de individuos puedan aportar a la definición y búsqueda de lo singular de la experiencia de lo vivido. De ahí que las viejas preguntas provenientes de una historiografía obrera no dejen de tener cierto aroma a “rancio”, en un momento historiográfico en donde buena parte de sus contribuyentes han renunciado de *facto* a seguir explicando los motores que están tras la *rueda de la historia* que dijera Marx.

En este camino por volver a recorrer, además, el papel ya no sólo del movimiento obrero y de la clase obrera, sino inclusive el de los *trabajadores* –o incluso si se prefiere el de los asalariados, como concepto carente de connotaciones ideológicas a priori– ha pasado desapercibido²⁹⁶. Una clara limitación en línea con la apuesta decidida por un *individualismo metodológico* de raíces posmodernas²⁹⁷. Este estudio, al contrario, pretende recuperar el papel de los trabajadores, desde la clase y el hecho generacional, en un sentido cultural pero sin renunciar a su componente radicalmente material. Es decir, trata de resituar el protagonismo de todos aquellos trabajadores –se identificaran con un *nosotros colectivo* o no, compartieran o no

²⁹⁴ Una lectura en clave positiva sobre estos cambios la ha proporcionado Jorge Uría: «El oficio del historiador ha cambiado también, y profundamente, sus reglas deductivas, sus métodos de selección de datos y su inspiración teórica y, en fin, sus fuentes de inspiración metodológica más profundas. La responsabilidad de los cambios hay que achacarla, en buena parte, a la adopción de una perspectiva antropológica que en los últimos años ha conseguido calar profundamente en el tejido profesional de la historiografía». URÍA, Jorge, “La historia social hoy” en *¿Qué entendemos hoy...*, *op.cit.*, p. 247.

²⁹⁵ Véase aquí de nuevo, PIQUERAS, José Antonio, “El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales” en *Formas de hacer...*, *op.cit.*, p. 85.

²⁹⁶ Como en parte se adelantó, dentro de las limitaciones e insuficiencias consabidas, la cuestión de la ‘militancia obrera’ pero también de las ‘culturas militantes’ ha ido adquiriendo cada vez un mayor peso dentro de la historiografía de corte obrerista. Aunque en perspectiva internacional comparada el retraso es notable, sin embargo, y teniendo presente la propia evolución de la historiografía de la historia social reciente, la incorporación de esta temática si bien no puede ni debe calificarse de *novedad* en términos absolutos, al menos, en términos relativos así se podría llegar a calificar. Véase lo apuntado en la *nota* 187 y en la *nota* 270, entre otras.

²⁹⁷ Véase, de nuevo, aquí, JOYCE, Patrick, “¿El fin de la historia social?” en *Ficción, verdad, historia...*, *op.cit.*, pp. 25-45.

un *imaginario colectivo propio*²⁹⁸ – que afrontaron la metamorfosis del mercado de trabajo durante los gobiernos socialistas, desde sus diferentes posiciones de poder en el mercado de trabajo.

Las consecuencias de método de esta propuesta son evidentes: lo que se pretende es retomar una historia social obrerista “clásica”, dotándola, a su vez, de una mayor complejidad en tanto a los tradicionales actores claves de los procesos históricos se suman las voces, experiencias, discursos del “nuevo precariado” en la propia reconstrucción y narración de unos hechos que suceden, tanto dentro como fuera de los centros de trabajo. Una narración que, no obstante, tiene un punto de origen y final común: la centralidad del conflicto capital-trabajo como vector de los principales acontecimientos históricos de un tiempo concreto²⁹⁹.

Igualmente resulta oportuno preguntarse a partir de estos presupuestos –sin salirnos de esta primera cuestión– por la naturaleza y carácter del movimiento obrero como sujeto histórico. Una hipótesis de trabajo que siempre ha estado condicionada por lo que aconteció tras la legalización de los partidos políticos y de los sindicatos “de clase”³⁰⁰. Las tesis de la “desmovilización del movimiento obrero” y de la “moderación” del sindicalismo y sus agentes como factores que aseguraron el “cambio político” y la “paz social”, han sido mayoritarias³⁰¹.

²⁹⁸ En primer lugar es de referencia obligada, una vez más, las tesis desarrolladas por Charles TAYLOR –*Modern Social Imaginaries...*, op.cit. [véase al respecto la tesis doctoral de, BENEDICTO RODRÍGUEZ, Javier, *Charles Taylor: Identidad, comunidad y libertad*, Tesis Doctoral, Universitat de València, 2005]–. Ahora bien, el estudio de la militancia obrera, y en concreto de las culturas militantes *ad hoc*, guarda una estrecha relación tanto con los procesos de identidad como con los procesos relacionados con la ideología. En este sentido, véanse, entre otros trabajos básicos, los siguientes: TOLOSANA, Carmelo, *Las máscaras de la identidad. Claves antropológicas*, Barcelona, Ariel, 1997; EAGLETON, Terry, *Ideología. Una introducción*, Barcelona, Paidós, 2005.

²⁹⁹ Remitimos aquí, una vez más, a lo expuesto en la *Presentación*.

³⁰⁰ Los *Pactos de la Moncloa* representarían para las bases y parte de la dirigencia del movimiento obrero una ‘derrota histórica’, que en pleno proceso de reorganización del movimiento sindical y de ‘cambio político’, transmutó las estrategias sindicales a la par que visualizó los límites de los proyectos alternativos. Una *derrota* que ha influido poderosamente en los propios estudios publicados, a la hora de evaluar, de forma adecuada, el papel del movimiento obrero en el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la ‘consolidación de la democracia’. Aunque sobre esta cuestión se volverá detenidamente a los largo de los siguientes Epígrafes de esta investigación– de la presente investigación, véanse, primero, las siguientes lecturas del momento en, MARTÍNEZ ALIER, Juan, “El Pacto de la Moncloa: la lucha sindical y el nuevo corporativismo”, *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, nº 59/60, (1977), pp. 32-51; GRIMALDOS, Alfredo y GARCÍA, Andrés, *Contra el pacto de la Moncloa: algunas respuestas de la clase obrera*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1978; GARCÍA CASTRO, Eladio, *La crisis económica: Alternativa democrática al Pacto de la Moncloa*, Madrid, Manifiesto Editorial, 1978; en segundo lugar, el estudio monográfico central acerca de los *Pactos de la Moncloa* en, TRULLÉN i THOMÀS, Joan, *Fundamentos económicos de...*, op.cit.; tercero, para una visión personal-institucional, FUENTES QUINTANA, Enrique, “De los Pactos de la Moncloa a la Constitución (julio 1977-1978)” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *Economía española de...*, op.cit., pp. 23-34; en cuarto lugar, un muy interesante estudio comparativo en, SABORIDO, Jorge y BERENBLUM, Rubén L. (comps.), *Los Pactos de la Moncloa y la Argentina hoy*, Buenos Aires, Macchi, 2002; y, en quinto lugar, una serie de trabajos historiográficos que han acentuado, desde diferentes ángulos, las consecuencias de los siempre recordados *Acuerdos*: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “El Movimiento Obrero en la España del tiempo vivido: del *sujeto político* al nuevo «precariado»” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y id. (coord.), *Manuel Tuñón de Lara...*, op.cit.; ARAYA GOMÉZ, Rodrigo, “Asegurar el pan..., op.cit.; ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, “Con su propia voz. Los militantes de base ante el cambio ideológico del PCE y el PSOE en la etapa central de la transición española” en *Resistencia, militancia política, transición*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 73, (2012), pp. 123-143.

³⁰¹ Lecturas críticas de este proceso que toman como referente histórico la experiencia de los ‘Consejos Obreros’ en Italia en, QUINTANA, Francisco (coord.), *Asalto a la fábrica. Luchas autónomas y reestructuración capitalista (1960-1990)*, Barcelona, Alikornio, 2000; y RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El Gobierno imposible...*, op.cit.. Véase aquí también el interesante trabajo colectivo de, ESPAÍ en

Enfoques, que conectan, en buena medida, con la visión institucional de la transición hoy dominante, y que, a su vez, han transmitido una imagen colectiva en el presente acerca de la ausencia de grandes conflictos y de violencia durante los últimos años del franquismo y la propia transición³⁰². Aunque, ciertamente, estas *imágenes-fuerza* en estos últimos años comiencen a decaer, ante las cada vez más abundantes evidencias y datos, acerca de la fuerte e intensa violencia política durante estos mismos años e incluso los primeros años ochenta.

Pero volviendo a consensos historiográficos mayoritarios, por parte de Robert Fishman se apuntó una tesis que ha de tenerse más que presente de cara a cualquier tipo de estudio al respecto:

«La moderación del movimiento obrero contribuyó al proceso de consolidación del régimen democrático al prevenir la dinámica [...] de polarización sociopolítica, y al evitar el peligro de una crisis económica aún más profunda como resultado de las exigencias militantes».

Una *apuesta* por la moderación en medio de importantes dilemas organizativos que en buena parte estaría protagonizada por “[l]a poca disposición de los trabajadores a apoyar luchas militantes, con la excepción de algunos contextos muy localizados, hizo prácticamente imposible seguir una política que no fue de moderación de una clase u otra”³⁰³. Precisamente en esta investigación se tratará de evidenciar la *tesis* contraria.

Pero no se puede desligar este multicausal proceso del papel subsidiario que jugaron los sindicatos *de clase* en este mismo periodo al estar “subordinados en gran medida al ritmo de las transformaciones políticas”³⁰⁴. A lo que se sumaron las duras consecuencias de la crisis

BLANCH (coord.), *Luchas autónomas en los años setenta: del antagonismo al malestar social*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008. Desde la historiografía y otras ciencias sociales, tesis como la desmovilización del movimiento obrero desde la propia dirigencia o a partir de las propias demandas de sus bases militantes, junto con los dilemas organizativos en el seno de los propios sindicatos, han estado presentes en no pocas monografías procedentes de diferentes tradiciones y enfoques: KÖHLER, Holm-Detlev, *El movimiento sindical en España: transición democrática, regionalismo, modernización económica*, Madrid, Fundamentos, 1995; FISHMAN, Robert M., *Organización obrera y retorno a la democracia en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1996; FÜHER, Ilse Marie, *Los sindicatos en España: de la lucha de clases a estrategias de cooperación*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996; OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, *op.cit.*; y BRENDEL, Cajo y SIMON, Henri, *Ilusiones políticas y lucha de clases: del antifranquismo al posfranquismo*, Bilbao, Virus, 2004. Todo ello junto con la polémica obra de, SASTRE GARCÍA, Cayo, *Transición y desmovilización política 1975-1978*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997.

³⁰² Junto con lo apuntado ya en la *nota* 253, véanse en concreto: OLARIETA ALBERDI, Juan Manuel, “Transición y represión política”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 70, (1990), pp. 225-262; y JIMÉNEZ, Oscar Jaime, *Policía, terrorismo y cambio político en España*, Valencia, Tirant lo Blanch / Universidad de Burgos, 2002.

³⁰³ FISHMAN, Robert M., *Organización obrera y...*, *op.cit.*, pp. 296 y 290, respectivamente. Véase, igualmente, una de sus últimas aportaciones que apunta también en esta línea en, *id.*, *Voces de la democracia*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008.

³⁰⁴ MARÍN ARCE, José M^a, *Los sindicatos y...*, *op.cit.*, p. 14. Y argumentaba: «En la forma pactada y controlada en que se llevó a cabo la transición se encuentra la clave explicativa más importante del tipo de relación que se estableció entre sindicalismo y política. Fracasada la ruptura democrática las cesiones que tuvieron que aceptar los sindicatos fueron muy importantes [...], y por otro, al agravarse la situación económica abandonaron las reformas estructurales tendentes a establecer un modelo económico más acorde con las aspiraciones del movimiento sindical». *Ibidem*, p. 15. En esta línea, el especialista Álvaro Soto Carmona ha afirmado con respecto al caso de CCOO –entonces la fuerza hegemónica dentro del movimiento obrero–: «La salida a la Dictadura planteaba la necesidad de llevar a cabo una ruptura, tanto en el plano político como sindical, evitando llegar a un pacto social. Para ello era necesario aumentar la movilización de los trabajadores, lograr un grado cada vez más alto de unidad de todas las fuerzas sindicales y reforzar organizativamente a la misma CCOO. Estos eran los objetivos propios del naciente sindicato, aunque en ocasiones ligados o dependientes de otras organizaciones políticas y sindicales, y los medios previstos para conseguirlos. El resultado fue clarificador tanto para los objetivos

económica entre la clase obrera y la obligada adaptación del movimiento obrero a unas nuevas “reglas de juego”³⁰⁵. En este sentido, las tesis planteadas por Álvaro Soto Carmona han sido de enorme claridad:

«El punto clave del debate no es si la clase obrera ha contribuido o no al proceso que permite la llegada de la democracia en España, hecho indiscutible, sino si la clase obrera, una vez creadas las reglas básicas del juego democrático, ha contribuido en la misma medida a la democratización, y en este último sentido el compromiso ha sido menor. Uno de los motivos de esta actitud hay que buscarlo en los efectos de la crisis, que les hizo situar como demanda prioritaria el mantenimiento del empleo, despreocupándose por su ‘compromiso’ político activo y limitándose a votar cada cierto tiempo»³⁰⁶.

En segundo lugar, este estudio pretende enlazar con la creciente demanda de recuperar parte de los temas originarios de la historia social³⁰⁷. Su definitiva institucionalización – superando así su propia concepción original como una historia *alternativa* a los dictámenes de la historiografía política– junto con la ampliación de su temática hasta prácticamente no dejar cuestión alguna fuera de su alcance, ha conducido en la práctica a la imposibilidad de su definición.

Pese a todo, no pocos historiadores provenientes de la historiografía social han venido advirtiendo, desde hace tiempo, de los “riesgos” que acechan a esta línea de investigación. Ahora no se discute sobre lo que puede ser o no su campo de análisis, en tanto la historia social por su propia indefinición lo abarca todo lo competente a la Historia en mayúsculas. No se trata tampoco de esbozar una historia social comprometida³⁰⁸, aunque sí cabría hablar de una historia como un “proyecto social”³⁰⁹ o del compromiso de historiador con su sociedad³¹⁰. Por no

como para los medios: *así, donde CCOO fue autónoma o llevó la iniciativa, los resultados fueron los deseados [...]. En cambio, en los objetivos y medios donde fue dependiente, los resultados no fueron plenamente satisfactorios* (ruptura política y pacto social –Acuerdos de la Moncloa–), o *absolutamente insatisfactorios* (unidad sindical)». SOTO CARMONA, Álvaro, “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)” en RUIZ, David (dir.), *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*, Madrid, Siglo XXI, 1993, p. 456 [cursivas en el texto original]. Además de lo ya citado en la nota 300, véase el interesante relato, a modo de testimonio, que ofreció, FONTANA, Josep, “Los comunistas en el final de la dictadura” en BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (eds.), *«Nosotros los comunistas»...*, op.cit., pp. 405-418. Un texto que comenzaba de la siguiente forma: «Quisiera ocuparme de uno de los misterios de la transición, como es el de que el Partido Comunista de España la iniciase como la fuerza más importante de la oposición y saliese de ella derrotado y sin futuro. Pienso que hay dos explicaciones posibles para ello. La más visible, pero también la más superficial, es la que se deriva de los errores que sus dirigentes cometieron en la transición. La segunda, estrechamente relacionada con ésta, es la incapacidad de los dirigentes del exilio de formular un programa político adecuado a las realidades del país en la segunda mitad del siglo XX». Ibídem, p. 405.

³⁰⁵ Revelador en este campo fue el estudio de, PÉREZ DÍAZ, Víctor, “Orientaciones políticas de los obreros españoles hoy”, *Sistema*, nº 29-30, (1979), pp. 159-180. De nuevo, aquí consúltense las tesis de, WAISMAN, Carlos H., *Modernización y legitimación...*, op.cit..

³⁰⁶ SOTO CARMONA, Álvaro, “Conflictividad social y transición sindical” en TUSELL, Javier y id., (eds.), *Historia de la transición...*, op.cit., p. 385.

³⁰⁷ Junto con la abundante bibliografía apuntada en este mismo capítulo, consúltense también algunos trabajos publicados en estos dos últimas décadas y que, en gran medida, han girado en torno a estas mismas preocupaciones descriptas: CRAIG, Calhoun, *Critical Social Theory. Culture, History, and the Challenge of Difference*, Oxford, Blackwell, 1995; o, CANNADINE, David (ed.), *¿Qué es la historia ahora?* Granada, Universidad de Granada / Almed, 2005.

³⁰⁸ JOYCE, Patrick, “Lo social en la historia social” en *¿Qué entendemos hoy...*, op.cit., p. 156.

³⁰⁹ «Hay que comenzar a construir, a un tiempo, la nueva historia y el nuevo proyecto social, asentados en una comprensión crítica de la realidad presente. Para lo primero debemos rehacer nuestra forma de entender el ascenso del capitalismo como un progreso, para aprender a verlo como el desarrollo de una nueva forma de explotación; debemos volver a explorar tantas alternativas desechadas como

mencionar la escasa atención que hoy levantan los *usos públicos de la historia*³¹¹. Reminiscencias todas ellas de un pasado *felizmente* superadas.

Marcel van der Linden ha advertido de uno de los principales retos a los que se enfrenta la propia Historia Social: “la lucha contra la fragmentación”³¹². Una preocupación a la que se suma la necesidad de volver a introducir y a estudiar en todas sus dimensiones, y sin verse atrapados por aforismos o paradigmas previos, conceptos tan básicos como la “desigualdad”³¹³, la centralidad social del trabajo o el propio asunto del “conflicto” –o como se prefiere ahora, la “acción colectiva”–³¹⁴. Cuestión ésta última que ha sido progresivamente arrinconada cuando no abandonada por los investigadores o en el mejor de los casos *despojada* de sus propios matices conflictivos. De hecho, el estudio del conflicto resulta ahora en sí mismo conflictivo –tanto a nivel teórico como metodológico– para estas nuevas líneas de investigación.

En todo caso, el estudio de la conflictividad obrera durante el franquismo y también en menor medida durante la época socialista, ha acaparado no pocos exámenes³¹⁵. No obstante, los trabajos hasta ahora publicados más allá de interrogarse por la naturaleza o no socio-política de

utópicas e inviables, para comprobar si acaso no había en ellas planteamientos que apuntaban a otras líneas posibles de evolución». FONTANA, Josep, *Historia: análisis del..., op.cit.*, p. 11.

³¹⁰ Junto con lo apuntado ya en *Presentación*, nota 67, una visión crítica de la desvinculación progresiva del historiador de su sociedad en, CARRERAS, Juan José y FORCADELL, Carlos, “Introducción. Historia y política: usos” en CARRERAS, Juan José y FORCADELL, Carlos (eds.), *Usos públicos de la historia: ponencias del VI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea* [6º, 2002, Zaragoza], Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza / Marcial Pons, 2003, pp. 40-41.

³¹¹ Remitimos para esta cuestión, al trabajo de TORRES RUIZ, Pedro, “Political Uses of History in Spain” en REVEL, Jacques y LEVI, Giovanni (coords.), *Political Uses of the Past. The Recent Mediterranean Experience*, London / Portland Or, Frank Cass, 2002, pp. 95-116. Por lo demás, véase también las reflexiones de, PEIRÓ MARTÍN, Ignacio, “«Ausente» no quiere decir inexistente: la responsabilidad en el pasado y en el presente de la historiografía española” en id. (ed.), *La(s) Responsabilidad(es) del..., op.cit.*, pp. 9-26.

³¹² LINDEN, Marcel van der, “Acumulación y fragmentación” en *¿Qué entendemos hoy..., op.cit.*, p. 167. Véase en esta línea, los trabajados contenidos dentro del volumen colectivo de, PIQUERAS, Juan Antonio y SANZ, Vicent (eds.), *A social history..., op.cit.*, y en concreto la introducción de los propios editores, “Traditional History and the New Social History of Labour in Spain” (pp. 1-19). Y, por último, la visión global de un autor tan complejo y polémico como es Geoff Eley en una de sus obras cumbres: ELEY, Geoff, *Una línea torcida..., op.cit.*

³¹³ «La desigualdad constituye el concepto que la historia social debe rescatar para desentrañar no sólo los momentos de conflicto más agudos sino también para ahondar en el modo de articulación entre grupos e individuos, en las relaciones entre hombres y mujeres, en el funcionamiento de las instituciones y, por supuesto, en el núcleo básico de funciones de toda economía, basada en la práctica en unas relaciones radicalmente desiguales [...]. Por eso el concepto de desigualdad podría elevarse a categoría normativa para la historia social». PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, “Expansión y retos de la historia social” en *¿Qué entendemos hoy..., op.cit.*, p. 206. De similar opinión sería, con algún que otro matiz, URÍA, Jorge, “La historia social hoy” en *íbidem*, p. 248.

³¹⁴ En esta línea se ha manifestado también el profesor Pérez Garzón: «Es necesario, por tanto, rehabilitar para la historia social la noción de conflicto porque precisamente la resolución de los conflictos –siempre contingente– es lo que ha permitido la evolución social. En consecuencia, no se puede abordar la historia social sin considerar ese concepto clave porque el antagonismo entre orden y desorden, entre poder y sublevación, entre dominio y rechazo forma parte de la propia organización social y de sus correspondientes salidas. La duración y persistencia de un conflicto, así como la contingencia de sus soluciones constituyen los mecanismos que abren las puertas al cambio y la evolución social». PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, “Cuestiones de Historia Social en la estela de Tuñón de Lara” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coords.), *Manuel Tuñón de Lara..., op.cit.*, p. 25.

³¹⁵ Nos remitimos aquí en el Capítulo “11. En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (febrero-julio de 1984)”.

la propia conflictividad obrera durante la dictadura³¹⁶, y de realizar en la mayor parte de los casos un mero análisis cuantitativo del asunto –junto con su posible inclusión en los ciclos de conflictividad– en pocas ocasiones se ha interconectado esta misma cuestión con las estrategias de lucha desarrolladas por el nuevo movimiento obrero bajo el franquismo, así como durante la propia transición a la democracia³¹⁷.

Por último, y tal como se ha insistido en este y otros capítulos, urge retomar el papel del trabajo humano en la formación y el devenir de la historia contemporánea en sus diferentes épocas. Es decir, necesitamos volver a resituar el conflicto capital-trabajo en el centro del trabajo histórico. Y volvemos así al primero de los axiomas desarrollados en la *Presentación*: sin examinar *cómo y por qué cambian los modos de producción*, difícilmente pueden concretarse las bases de los cambios históricos acontecidos en nuestras sociedades contemporáneas.

³¹⁶ Trabajos de referencia en, MARAVALL, José María, *Dictadura y disenso...*, *op.cit.*; FERRI, Llibert, MUIXÍ, Jordi y SANJUÁN, Eduardo, *Las huelgas contra Franco (1939-1956). Aproximación a una historia del movimiento obrero español de posguerra*, Barcelona, Planeta, 1978; BABIANO, José y MOSCOSO, Leopoldo, “Los conflictos sociales en fase depresiva ante la adopción de políticas de ajuste: El caso español”, *Zona Abierta*, nº 56, (1991), pp. 121-173; YSÀS, Pere, “Huelga laboral y huelga política. España 1939-1975” en BONAMUSA, Francesc (ed.), *La Huelga General*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 4, (1991), pp. 193-212; SOTO CARMONA, Álvaro, “Huelgas laborales en...”, *op.cit.*; GÓMEZ ALÉN, José, “Huelgas políticas o laborales. El conflicto social en la Galicia franquista” en CASTILLO, Santiago y ORTIZ DE ORRUÑO, José M^a (coords.), *Estado, protesta y...*, *op.cit.*, pp. 645-659. y finalmente, DOMÈNECH, Xavier, “El problema de...”, *op.cit.*. En este sentido, los volúmenes que dirigiera y coordinara Rubén Vega sobre el origen, los efectos y consecuencias de las huelgas de 1962 en el devenir del *nuevo* movimiento obrero constituyen una de las más importantes referencias en este campo de estudio – VEGA, Rubén (coord.), *El camino que marcaba Asturias. Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional*, Gijón / Oviedo, Ediciones Trea / Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002; id. (coord.), *Las huelgas de...*, *op.cit.*–.

³¹⁷ Véase la referencia apuntado en la *nota 315*. De ahí que, de nuevo, las advertencias de Xavier Domènech se tengan que tener en cuenta: «El estudio de la conflictividad obrera es central para entender la historia del movimiento obrero. De hecho el movimiento obrero, incluso la clase obrera, no existiría como tal sin el fenómeno de la conflictividad que la define. En realidad podemos afirmar, desde el legado thompiano, que la clase obrera se formó a partir de la experiencia del conflicto, bien acumulado en la tradición recibida o vivido como propio, que reúne a la gente en grupos enfrentados que comparten características comunes y generan a la larga una cultura y formas de organización propias». DOMÈNECH, Xavier, “El problema de...”, *op.cit.*, pp. 140-141.

II. La conquista del poder político del socialismo español: la *misión histórica* del PSOE (1972-1982)

4. La metamorfosis del PSOE: las contradicciones del *socialismo modernizador* (1972-1992)

«Sabemos que la ideología de la misión justifica a veces actitudes de alguna arrogancia entre las gentes más diversas. La creencia de que uno tiene una misión en la vida suele ir asociada a la idea de que uno tiene el derecho y el deber de cumplir esa misión venciendo toda resistencia, en especial la resistencia de los demás. Por lo demás, no hay que olvidar los reflejos adquiridos durante la adolescencia política de muchos socialistas en la escuela de la revolución: perdidas las ideas revolucionarias, pueden quedar los tics gestuales y de comportamiento, como quedan los síntomas histéricos después de olvidado el trauma originario».

Víctor PÉREZ DÍAZ, *España puesta a prueba, 1976-1996*¹.

El presente capítulo examina una parte significativa de la historia política del socialismo español, y con ella de la historia del país en su conjunto, desde 1972/1974 a 1982. Dos lustros que, marcados por la aceleración de los tiempos políticos, darían forma y contenido a lo que se ha conocido como el *proyecto de la modernización socialista*.

En este empeño no partimos de cero pero tampoco desde una tradición investigadora, que llegado el caso nos pudiera ayudar a solventar cuestiones previamente conocidas de forma más abreviada. Toca, por tanto, reconstruir globalmente un periodo repleto de acontecimientos. Y no puede ser de otra manera desde una tradición historiográfica que no sólo se pregunta *cómo* y *por qué* sucedieron unos hechos concretos, sino que además tienen por fin cuestionar lo hasta ahora aportado.

La herramienta analítica y metodológica a utilizar en tal tarea ya ha sido presentada². Sin embargo, existen dos caminos de aproximación complementarios a la historia política, que nos pueden ser útiles a raíz de nuestros planteamientos de partida. Primero, una historia política de las élites, pues tanto el PSOE como en tiempos los ejecutivos socialistas, los dirigentes y los propios gobernantes terminarían por representar y ser parte del poder en sí mismo a nivel real y a nivel simbólico. De esta forma, el examen de los “sujetos con poder” como lo definiera el profesor Juan Pro Ruiz cobra una vital importancia. En otras palabras, necesitamos complementar la historia política más clásica con una nueva forma de observar la historia de las élites políticas y económicas. Un enfoque que, hasta ahora, ha estado limitado al aplicarse simétricamente a tal objeto de estudio “el modelo de análisis previamente desarrollado para estudiar las organizaciones obreras”³. En el presente estudio se ensayarán nuevos caminos de aproximación que se irán desgranando en su momento oportuno. Segundo, comienza a ser urgente una aproximación global a la “cultura política” característica de la dirigencia socialista, pues un mayor conocimiento sobre la misma nos abriría la posibilidad de introducirnos en un aspecto de notable relevancia: los comportamientos, las actitudes, los signos, la simbología... en suma, la forma de entender el ejercicio del poder político. Pero no sólo, pues como planteó

¹ PÉREZ DÍAZ, Víctor, *España puesta a...*, *op.cit.*, p. 52.

² Véase lo señalado tanto en la *Presentación* como en el apartado “2.1. Nuestros caminos de aproximación: interrogantes e hipótesis de trabajo”.

³ PRO RUIZ, Juan, “Sujetos con poder en la España contemporánea” en RIVERA, Antonio, ORTÍZ DE ORRUÑO, José M^a y UGARTE, Javier (eds.), *Movimientos sociales en...*, *op.cit.*, p. 65. Igualmente consúltese, desde una perspectiva historiográfica, una importante serie de estudios colectivos sobre las élites políticas en, LUENGO, Félix y MIRALLES, Ricardo (coords.), *Las élites en la España contemporánea*. Dossier monográfico *Historia Contemporánea*, nº 8 (1992); CARASA, Pedro (ed.), *Élites. Prosopografía Contemporánea*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994; ALVARADO PLANAS, Javier (coord.), *Poder, economía, clientelismo*, Madrid, Marcial Pons, 1997; o, PANIAGUA, Javier y PIQUERAS, José Antonio (eds.), *Poder económico y...*, *op.cit.*.

Francisco Javier Caspistegui, ante todo, el concepto de cultura política debe asociarse al “conjunto de representaciones que vinculan al grupo humano en el plano político, es decir, una visión del mundo compartida, una común lectura del pasado, una proyección vivida conjuntamente”⁴. De hecho, la temprana formación de una singular visión de un proyecto de vida política compartida y asumida por la *dirigencia*, se terminaría por constituir en un factor representativo de esta misma élite socialista, que haría, primero, de la adaptación programática de la ideología de la modernización, y, posteriormente, de su apropiación, su razón de ser hasta vincularse *en sí y para sí* en torno a este paradigma.

En este entrecruce de caminos y problemáticas, las siguientes páginas avanzan una serie de hipótesis, argumentos y datos, a partir de los cuales se tratará de explicar, en suma, el éxito político, electoral y social que tendría la asunción del paradigma de la modernización por el PSOE, como paso previo para examinar el *cambio histórico* que su aplicación conllevó.

4.1. El «partido de la modernización»: las raíces políticas, ideológicas y culturales de la metamorfosis del PSOE

«En sí y para sí, no se trata aquí del mayor o menor grado alcanzado, en su desarrollo, por los antagonismos sociales que resultan de las leyes naturales de la producción capitalista. Se trata de *estas leyes mismas*, de esas *tendencias* que operan y se imponen con férrea necesidad. El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro».

Carlos MARX, *El capital*⁵.

«La tarea que teníamos que hacer no era la tarea clásica de un partido socialdemócrata [...]. Teníamos que hacer algo que trascendía la frontera de la alternativa socialdemócrata para asentar un proyecto nacional de una envergadura mayor. Teníamos que hacer, entre otras cosas, un proyecto de modernización y esto no era específicamente un proyecto socialdemócrata».

⁴ CASPISTEGUI, Francisco Javier, “La llegada del concepto de cultura política a la historiografía española” en FORCADELL, Carlos [et al.] (eds.), *Usos públicos de..., op.cit.*, p. 177. En todo caso, el acuerdo sobre este poliédrico término ha dado mucho que hablar como lo demuestran los numerosos acercamientos realizados desde principios de la década de los setenta. En primer lugar, consúltese la aclaratoria presentación de, PÉREZ LEDESMA, Manuel y SIERRA, María, “Introducción” en id. y id. (eds.), *Culturas políticas..., op.cit.*, pp. 7-15. Por lo demás, ALMOND, Gabriel A. y VERBA, Sidney, *La Cultura Cívica*, Madrid, Euroamérica, 1970; GIBBINS, John R. (eds.), *Contemporary Political Cultural. Politics in a Postmodern Age*, London, Sage Publications, 1990; BERSTEIN, Serge, “Introduction. Nature et function des cultures politiques” en id. (dir.), *Les cultures politiques en France*, Paris, Du Seuil, 1999, pp. 7-31; BOTELLA, Joan, “En torno al concepto de cultura política: dificultades y recursos” en CASTILLO, Pilar del y CRESPO, Ismael (eds.), *Cultura Política. Enfoques teóricos y análisis empíricos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1997, pp. 17-37; FORMINASSO, Ronald P., “The concept of political culture”, *Journal of Interdisciplinary History*, vol. XXXI, n° 3, (2000), pp. 398-403. Un estado de la cuestión en, DIEGO ROMERO, Javier de, “El concepto de «cultura política» en ciencia política y sus implicaciones para la historia”, *Ayer*, n° 61 (2006), pp. 233-266. En lo que se refiere al lento proceso de renovación de la historia política, esta cuestión ha estado especialmente presente en los diferentes encuentros de la Asociación de Historia Contemporánea. Entre las aportaciones más notables al respecto, CARNERO, Teresa, “La renovación de la Historia Política”, pp. 173-183; y, RUIZ-MANJÓN, Octavio, “Nuevas orientaciones en Historia Cultural”, pp. 197-205, ambos en, MORALES MOYA, Antonio y ESTEBAN, Mariano, (eds.), *La historia contemporánea de España. Primer Congreso de Historia Contemporánea de España [1º, 1992, Salamanca]*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996; BERAMENDI, Justo G., “La cultura política como objeto historiográfico. Algunas consideraciones de método” en ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso (presidente Comité Organizador) [et al.], *Cultura y civilizaciones: III Congreso de la Historia Contemporánea [3º, 1996, Valladolid]*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 74-94.

⁵ MARX, Karl, “Prólogo a la primera edición” en *El capital...*, *op.cit.*, vol. I, p. 7.

Felipe GONZÁLEZ, Presidente del Gobierno (1982-1996)⁶.

En el discurso de apertura del XXXII Congreso del PSOE, en octubre de 1990, Felipe González lanzaba una célebre frase que sería recordada en varias ocasiones: “También se puede morir de éxito”⁷. Esta declaración, tras ocho años en el poder, y a pesar del desgaste institucional de los gobiernos socialistas, resultaba sumamente explícita de las expectativas generadas en torno al proyecto emprendido tras el histórico triunfo electoral de 1982. *La vorágine del cambio*, tal como la definiera Marshall Berman, parecía haberse apoderado de la sociedad española, y de sus élites en particular, en un momento de rápidos cambios globales⁸.

En aquel entonces, una vez consolidada y asentada la democracia, el “concepto de modernización” se convertiría en prácticamente un *mito*. La idea de una *cercana* modernización del país actuaría como un poderoso *cliché* en la mentalidad de millones de españoles. No era extraño en un país en donde los proyectos democráticos “progresistas”, como el caso de la II República, se habían visto truncados y marcados por la violencia política. De ahí que aquella misma experiencia histórica influyera, a posteriori, en la formación, en buena parte de la sociedad española auto-considerada progresista y/o de izquierda, de dos *ideas-fuerza*: la de la historia como “un constante retorno” ante cada uno de los episodios de *avance* o de *modernización*; y por otro lado la del “cambio por el cambio”, concepción de “gran eficacia ideológica tanto en el franquismo como en la posterior democracia”⁹. Precisamente este transcurrir de la historia contemporánea española había conducido a la elaboración de una representación del pasado, que respondía a lo que se ha denominado como “la teoría de la anormalidad”, construyéndose, en paralelo, otro referente: “la modernidad por venir”¹⁰. O, como lo denominará Cyril E. Black, la “angustia de la modernización”¹¹.

⁶ Declaraciones de Felipe González a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, pp. 501-502. Y añadía en otra entrevista otro aspecto que debe considerarse oportunamente: «Creo honestamente que mi acierto –si es que puedo atribuírmelo– fue tener claro dónde quería que llegara el país. Desde el principio [...] lo que quería que fuera la orientación del país, en sus prioridades internas y de política exterior. Internas: modernización, liberalización de la economía, mayor cohesión social, descentralización [...]. Una descentralización que nos permitiera vivir en sintonía con una realidad que era una realidad subyacente, de acuerdo con la propia Constitución, con una Constitución incluyente, y que nos permitiera vivir la descentralización sin pérdida de la cohesión, sin rupturas territoriales. En el exterior: cubrir las expectativas de entrar en la UE, universalizar nuestras relaciones, priorizar América Latina, mejorar las relaciones con el Mediterráneo...». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 871. La ideología de la *modernización* como *paradigma* explicativo central del accionar político por parte del socialismo español desde entonces, ha permanecido incrustada en las siguientes generaciones socialistas. Así se expresaba quien fuera Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando exponía su proyecto programático décadas después: «Busco una mayoría suficiente que permita gobernar para desarrollar la segunda etapa de un proyecto de progreso y modernización definitiva de España. Sería la modernización definitiva de España en lo económico, en lo social, en los derechos, en las libertades individuales y en su proyección hacia el mundo, que tiene para mí una gran importancia. España está hoy donde tiene que estar en el mundo, se ha ido de donde no tenía que haber estado y hemos abierto nuevos espacios de presencia y de identidad». Entrevista de Javier Moreno al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero publicada en el diario *El País*, 2 de septiembre de 2007.

⁷ Noticia, “Felipe González, “«También se puede morir de éxito»”, *El País*, 10 de noviembre de 1990.

⁸ BERMAN, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, Madrid, Siglo XXI, 1988.

⁹ ORTEGA, Félix, “La modernización social...”, *op.cit.*, p. 45 y 47, respectivamente.

¹⁰ *Ibidem*, p. 44.

¹¹ BLACK, Cyril Edwin, “La dinámica de la modernización: un repaso general” en NISBET, Robert., KUHN, Thomas S. WHITE, Lynn [et al.], *Cambio social...*, *op.cit.*, p. 249.

En todo caso, la sentencia lapidaria del mismísimo Manuel Fraga, *Spain is different*, seguía pesando como una losa a principios de los noventa. Aunque, en términos generales, la sociedad entrevía los notables cambios producidos en unos pocos años, los *residuos* del pasado en forma de representaciones colectivas seguían estando presentes. No era para menos en un país que tan sólo recientemente había superado una de las dictaduras más terribles y sanguinarias de la historia contemporánea europea, y cuya memoria colectiva viva o transmitida estaba marcada a *fuego y sangre*. Todas estas circunstancias llegarían a crear un conjunto de representaciones en torno al significado de la modernización que pueden ser sintetizados en tres aspectos: a) la desconfianza en la voluntad y capacidad endógena de la sociedad española; b) la innovación como algo foráneo; c) la modernización como aculturación¹². La superación de esta imagen colectiva sobre las posibilidades de modernizarse como nación, de hecho, supuso uno de los retos más grandes a los que se ha tenido que enfrentar la ciudadanía del país en su conjunto.

El concepto, el paradigma, el axioma... de la “modernización” desde hace tiempo ha transmutado en una *idea-fuerza* que recorre con desmedida alegría todos y cada uno de los discursos políticos, indiferentemente de ideologías, propuestas programáticas y demás circunstancias. Estamos ante un paradigma que lo impregna todo: lo político, lo cultural, lo historiográfico... Recientemente, el historiador Ismael Saz indicaba lo siguiente:

«No se trata, insisto, de entrar aquí en la discusión de tales supuestos, pero sí de constatar que, a falta de debate, parecería que el de la modernización es el único paradigma realmente existente en la historiografía y las ciencias sociales, o, al menos, el único aplicable a España»¹³.

No hace falta indagar demasiado ni sumergirse en cuestiones metafísicas —o *epistemológicas* puestos a la tarea— para verificar tal afirmación. Dejando aparte el caso de la más que limitada “modernización franquista”¹⁴, la *idea-fuerza* de la modernización se ha transformado en una constante que ha estado presente desde la transición postfranquista a nuestros días. Con demasiada ligereza, al igual que ocurre con otros tantos conceptos aparentemente “neutros”, el concepto de modernización tiene hondos y largas ramificaciones políticas, ideológicas e inclusive históricas. Para nuestro caso de estudio, se debe señalar que a través de tal *idea-fuerza* se justificó toda una estrategia política, económica, social y cultural.

La asociación entre el Gobierno socialista (1982-1996) y la modernización del país en sus respectivos ámbitos, resulta su más acabado ejemplo. Leída tal etapa histórica como un éxito político, a modo de *salto adelante* en la historia de España¹⁵, tanto el PSOE, el Gobierno socialista así como los “expertos” y “académicos” no han dejado de resaltar esta asociación, eso sí, sin prestar atención a sus significados más profundos. Así pues, y antes de entrar a describir los puntos de apoyo de la ideología de la modernización socialista, de esta *ideología del poder* en otras palabras, se plantearán algunos necesarios puntos de partida.

Así la utilización acrítica del concepto de modernización es el origen de una controversia inconclusa. De entrada, la búsqueda de una definición que nos pudiera ser útil

¹² ORTEGA, Félix, “La modernización social...”, *op.cit.*, p. 46. Del mismo autor, id., *El mito de...*, *op.cit.*, p. 1994.

¹³ SAZ, Ismael, “Introducción” en id. (ed.), *Crisis y descomposición del franquismo*. Dossier monográfico *Ayer*, nº 68, (2007), p. 29.

¹⁴ Una última y perspicaz revisión sobre el asunto en, GUERRERO, Diego, “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*.

¹⁵ ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*.

evidencia un debate conflictivo¹⁶, pues en juego está, y no otra cosa, la real posibilidad de catalogar una fase concreta del “modelo de acumulación capitalista”¹⁷. Se trata, por tanto, de la construcción instrumental de una poderosa ideología que ha venido operando de forma persistente en la historia contemporánea reciente. Dos características básicas son definitorias de tal paradigma: su fuertes carga de “relativismo”, de “occidentalismo” y de propio “endogenismo”; y segundo, «la ideología de la modernización [ha] operado como legitimadora del crecimiento capitalista»¹⁸.

El origen inmediato de la mencionada ideología se ha de buscar en la formulación emanada, desde los centros de poder de los Estados Unidos tras la II Guerra Mundial. Inaugurada la *guerra fría* y en pleno conflicto por la hegemonía entre capitalismo y el denominado socialismo real¹⁹, la elaboración del paradigma de la modernización respondió a un objetivo concreto²⁰: extender el modelo de sociedad de los países del capitalismo avanzado al resto de países no democráticos y subdesarrollados, y en el que la implantación de la democracia liberal y la evolución del libre mercado, según la misma teoría, venían a constituirse en dos caras de la misma moneda. Como explicó en su día el Colectivo IOE: “la propuesta formal de cambio gradual para que las sociedades «atrasadas» adoptaran el modelo norteamericano»²¹. Una interpretación que ha conducido a lo que se ha denominado el *prejuicio democrático*²².

Así pues, la construcción teórica del modelo canónico de la modernización estaría caracterizado, ante por todo, por ser un,

«proceso que aumenta las capacidades políticas y económicas de una sociedad; aumenta las capacidades económicas por medio de la industrialización, y las capacidades políticas a través de la

¹⁶ Sobre el concepto de la ‘modernización’ una primera aproximación, junto con las principales escuelas –la *funcionalista* y la *marxista*– en, SOLÉ, Carlota, *Modernidad y modernización...*, *op.cit.*.

¹⁷ Una definición tradicional se encuentra en la ‘voz’ de uno de los más conocidos *diccionarios de sociología*: «La teoría de la modernización fue un paradigma analítico dominante en la sociología americana para la explicación de los procesos globales por los cuales las sociedades tradicionales alcanzaban la modernidad. (1). La modernización política implica el desarrollo de instituciones clave –partidos políticos, parlamentos, sufragio y votación secreta– que fundamentan la participación en la toma de decisiones. (2). La modernización cultural normalmente conlleva la secularización y la adhesión a ideologías nacionalistas. (3). La modernización económica, aunque distinta de la industrialización, va asociada a profundos cambios económicos: un incremento de la división del trabajo, el uso de técnicas de gestión, tecnología perfeccionada y el aumento de los servicios comerciales. (4). La modernización social implica un aumento de la alfabetización y la urbanización y el declive de la autoridad tradicional. Estos cambios se consideran en términos del aumento de la diferenciación social y estructural». Y añadía a continuación: «La teoría de la modernización ha sido criticada por dos razones: (1) la teoría de la modernización se basa en el desarrollo en Occidente y es, pues, un modelo etnocéntrico de desarrollo; (2) la modernización no lleva necesariamente al crecimiento industrial y a la distribución igualitaria de los beneficios sociales, puesto que es esencialmente un proceso no uniforme que da lugar al subdesarrollo y la dependencia». “Modernización” en ABERCROMBIE, Nicholas, HILL, Stephen y TURNER, Bryan S., *Diccionario de Sociología*, 2ª ed., Madrid, Cátedra, 1992, pp. 156-157.

¹⁸ COLECTIVO IOE, “La ideología de..., *op.cit.*, p. 81.

¹⁹ Del libro varias veces citado de Fontana véase en concreto, “2. La primera fase de la Guerra Fría (1949-1953)” en FONTANA, Josep, *Por el bien del imperio...*, *op.cit.*, pp. 85-132.

²⁰ Nos remitimos a la definición dada por el Colectivo IOE en su día y planteada ya en la *Presentación*, nota 189. Por lo demás, véanse las siempre sugerentes y provechosas tesis de, PARENTI, Michel, “Objetividad y paradigma dominante” *id.*, *La lucha de...*, *op.cit.*, pp. 148-160.

²¹ COLECTIVO IOE, “La ideología de..., *op.cit.*, p. 79.

²² BILL, James A. y HARDGRAVE, Robert L., *Comparative Politics. The Quest for Theory*, Boston, United Press America 1981, p. 74. A través de esta expresión los autores incidieron en el hecho de que tan sólo con una ‘democracia’ al estilo norteamericano se podría alcanzar la *modernidad*.

burocratización. El rasgo singular más atractivo de la modernización es que capacita a la sociedad para poder cambiar de la pobreza a la riqueza. Así, el proceso central de la modernización es la industrialización; el crecimiento económico se convierte en el principal objeto societal y la motivación del logro en la meta individual más importante [...]. Pero la modernización no es la fase final de la historia»²³.

Formulado con relativo acierto el *modelo*, tocaría pues dotarle de su constructo científico. Las ciencias sociales y económicas cuando no la historiografía no han dejado de suministrar argumentos, mediciones y demás hipótesis de trabajo. Ejemplos de la aplicación de dicho *modelo científico* no faltan²⁴. La clave del asunto estaría en averiguar cuándo una sociedad es tradicional, moderna o incluso posmoderna. Sucesivas fases de desarrollo de una sociedad vinculada a una economía capitalista: único camino para alcanzar la *modernidad*. A partir de este simplista pero eficaz modelo de catalogación se daría un segundo paso: ofrecer un

²³ INGLEHART, Ronald, *Modernización y posmodernización...*, *op.cit.*, p. 5. Otra de las definiciones clásicas ha sido sintetizada por Teresa Carnero de la siguiente forma: «El crecimiento de la economía sobre la base de una competitividad creciente y de un aumento sustancial de los sectores secundario y terciario; una mejora sensible de las condiciones sanitarias y de la esperanza de vida de la población; y un aumento significativo de la urbanización, de la alfabetización y de la escolarización en los niveles intermedios y superiores de la enseñanza y también de la difusión de la información». CARNERO, Teresa, “Introducción” en id. (ed.), *Modernización, desarrollo político...*, *op.cit.*, pp. 25-26. Véase asimismo algunas aportaciones críticas en torno a la teoría de la modernización en, PYE, Lucian W., “Political Science and the Crisis of Authoritarianism”, *American Political Science Review*, nº 84, (1990), pp. 3-19. Igualmente, y más allá de estas consideraciones debe remarcarse no pocos elementos *negativos* que suele traer aparejados los procesos modernizadores: «La modernización ha de entenderse, pues, como un proceso a la vez creativo y destructivo, que proporciona nuevas oportunidades y perspectivas a un alto coste de dislocación y sufrimientos humanos. La época moderna, más que cualquier otra, ha sido una época de asesinatos, de guerras civiles, religiosas o internacionales, de muchos tipos de genocidio y de campos de concentración [...]. Pocos son los dirigentes políticos que han tenido la visión de colocar las necesidades humanas de su pueblo por encima de los objetivos nacionales. Con frecuencia excesiva los medios para lograr la modernización se han hecho fines en sí mismo, por los que se ha combatido con un fanatismo y una brutalidad que se arriesga a sacrificios estos fines». BLACK, Cyril Edwin, “La dinámica de la modernización: un repaso general” en NISBET, Robert., KUHN, Thomas S. WHITE, Lynn [et al.], *Cambio social...*, *op.cit.*, p. 250.

²⁴ A modo de ejemplo para el caso de España entre otros muchos posibles, GOBERNADO, Rafael, *Modernización y cambio social* en RAMOS, Antonio (ed.), *España Hoy*, II vols., Madrid, Cátedra, 1991, vol. I Se decía allí: «La tendencia histórica de la estructura social de España es hacia la modernidad, entendiendo por tal la estructura observada en países más desarrollados que el nuestro». Y a continuación se ofrecía el repertorio por el cual la sociedad española había llegado a la modernidad: «un descenso de la natalidad; un aumento de la esperanza de vida; el crecimiento de las ciudades; la disminución drástica de la población que vive de la agricultura; un desarrollo extraordinario de la tecnología; la multiplicación de los medios de comunicación, tanto de personas como de ideas y de cosas; el aumento de la complejidad en la estructura social, en la que se aprecia el desarrollo de estratos sociales intermedios; la formación y proliferación de grandes organizaciones de todo tipo, tanto económicas como culturales, sociales y políticas». *Ibidem*, p. 231. Véanse también las aportaciones de, CASANOVA, José, “Modernización y democratización: Reflexiones sobre la Transición española a la democracia” en CARNERO, Teresa (ed.), *Modernización, desarrollo político...*, *op.cit.*, pp. 235-276; y, CORTES ALCALÁ, Luis, “La modernización de la sociedad española”, *Documentación Social*, nº 88, (1992), pp. 57-76, para quien los cuatro grandes proyectos de transformación social en los que hay que insertar la estrategia modernizadora en España serían los siguientes: «1. La transformación del sistema político y administrativo, condujo a la instalación de un sistema político democrático y a la reforma de las instituciones básicas del régimen franquista; 2. La apertura de la sociedad española hacia el exterior. La entrada en la CEE y la OTAN constituyen los dos momentos centrales del proceso; 3. La adaptación de las estructuras productivas a las exigencias derivadas de la incorporación plena al ‘sistema económico mundial’ [...]; 4. La consolidación de un Estado del Bienestar». *Ibidem*, pp. 57-58. Y por último, véase el cuadro proporcionado, a modo de verdadero compendio de lo que es y no es la ‘modernización’ en, TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, pp. 36-37.

instrumental estadístico, objetivo en apariencia y en forma, para desgranar cada fase con sus respectivos adelantos y retrocesos²⁵. Nos encontramos, por tanto, ante un modelo cerrado en el que debería medirse con precisión un conjunto de fases sucesivas y unidireccionales. Todo ello con una condición *sine qua non*: “el capitalismo avanzado no es una opción más: aparece como el horizonte «natural» del progreso humano”²⁶.

Como en todo debate científico-académico, una escuela de pensamiento ha sido dominante²⁷. En nuestro caso, la *escuela funcionalista* ha encumbrado la teoría hegemónica, siendo su base el hecho de plantear una visión “bastante relativista de la modernización, pues hablar de una sociedad «más o menos moderna» no equivale a dar la descripción precisa de un determinado proceso de cambio”²⁸. De este modo, a través del binomio categórico de “antes” y “después”, estaría en las manos del científico resolver el grado de modernización de una sociedad. El problema del posible cuestionamiento del modelo económico, del patrón productivo, no tendría espacio según este esquema reduccionista.

En el caso español, incluido entre los países del capitalismo avanzado, la modernización del país estuvo irresolublemente ligada a la inserción en los procesos económicos del capitalismo internacional. Esta interpretación netamente liberal del citado proceso, ha sido la hegemónica dentro de la academia en donde no han faltado *productos* más o menos elaborados²⁹. Y aquí es donde entra en juego el proyecto de modernización que asumiría el

²⁵ La propia Teresa Carnero considera como uno de los *grandes logros* la incorporación de estas *novedosas técnicas cuantitativas* para el análisis de la modernización: «De hecho el empleo de técnicas cuantitativas pasa a convertirse en una exigencia cuando el objeto de estudio es un fenómeno como la modernización en el que se imbrican aspectos como la ideología, el poder político y la economía. Precisar el alcance de este proceso de mudanza hace necesario conocer con rigor la trayectoria de las variables fundamentales que lo globalizan, relacionadas con los avances socioeconómicos y políticos asociados, respectivamente, al binomio crecimiento económico-movilización social; a la igualdad política y a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores». CARNERO, Teresa, “Introducción” en id. (ed.), *Modernización, desarrollo político...*, op.cit., p. 24.

²⁶ COLECTIVO IOE, “La ideología de...”, op.cit., p. 80. Especialmente significativo en este sentido han sido las tesis de, HUNTINGTON, Samuel P., *La tercera ola...*, op.cit.; id., “Desarrollo político y deterioro político” en CARNERO, Teresa (ed.), *Modernización, desarrollo político...*, op.cit., pp. 167-220. Una referencia clásica y crítica, POULANTZAS, Nicos, *La crisis de las...*, op.cit..

²⁷ Revisense aquí las tesis de, ANDERSON, Perry, *Los orígenes de...*, op.cit..

²⁸ SOLÉ, Carlota, *Modernidad y modernización...*, op.cit., p. 95. Asimismo, y siguiendo de nuevo el análisis de la autora, lo que nos encontramos es con un planteamiento en extremo maniqueo: «Por su vaguedad y alto nivel de abstracción, los enfoques funcionalistas sobre la modernización son modelos puramente teóricos inapropiados para explicar un proceso de transformación societal ‘empírico’ (real y específico). Los modelos funcionalistas de la modernización resultan, por lo tanto, inoperantes e inaplicables al análisis del proceso (o procesos) en particular que tienen lugar en el período histórico contemporáneo en áreas concretas del mundo si no en su totalidad». Ibídem, pp. 96-97. Según Cyril E. Black la división entre lo *moderno* y lo *no moderno* también resulta un ejercicio estéril y problemático ya que: «[i]ncluso en los países más avanzados están todavía modernizándose, y sólo mediante un esfuerzo de imaginación puede uno conjeturar que rasgos llegarán a ser característicos de todas las sociedades modernas y que otros rasgos no son más que idiosincrasias de tipo cultural pertenecientes a sociedades específicas». BLACK, Cyril Edwin, “La dinámica de la modernización: un repaso general” en NISBET, Robert., KUHN, Thomas S. WHITE, Lynn [et al.], *Cambio social...*, op.cit., p. 233.

²⁹ Un constructo teórico avanzado y elaborado del propio paradigma de la modernización como *entelequia* que todo lo explica a nivel histórico, puede verse en el libro publicado por quien llegará a ser Secretario General de Empleo bajo los ejecutivos socialistas: ESPINA, Álvaro, *Modernización y estado...*, op.cit. Dicha obra –como en parte se anunció– además de su escaso recorrido histórico contiene algunos apartados bastante aclaratorios de la concepción ideológica de la modernización tal y como la entendieron los socialistas: “Introducción. Las dos «leyes» de la modernización” (pp. XV-XVII); “1. Tres modelos de modernización” (pp. 1-37); “2. Otras tres características del caso español” (pp. 39-71). Lo

PSOE, sintetizado en un “proceso de cambio social gradual” a través de un progresivo desarrollo económico. Tal como indicó Enrique Gil Calvo, comparándolo con la propuesta de la “revolución capitalista” de Berger, el proyecto de modernización supondría “tanto el crecimiento económico auto-sostenido como la democracia, la secularización y la competencia del mercado”³⁰.

Asociado tal proyecto a unos valores supuestamente *alternativos*, como no se cansaría en denunciar el sociólogo James Petras³¹, el PSOE y una vez en el poder, el Gobierno socialista, lograrían identificar a nivel social el periodo franquista como anti-moderno, y democracia con modernización en positivo. ¿Simplista? Sí, pero tremendamente eficaz para justificar su política económica. Con todos los matices que se quieran añadir, tal operación/identificación resultó altamente positiva. Por este camino, y siguiendo la tesis expuesta en su día por Luciano Cafagna, el socialismo se haría acreedor del *liderazgo modernizador*, a pesar de todas las *contradicciones y giros* que se irán desgranando³².

Resuelto sin contratiempos el problema del modelo económico tras la aprobación de los *Pactos de la Moncloa*, y una vez que el socialismo renunció a las veleidades socialdemócratas de carácter transformador, el punto de atención se centró en observar y examinar el *grado* en el que se encontraba la modernización del país. Fue de nuevo el Colectivo IOE quien con más precisión supo captar metafóricamente esta operación ideológica:

«La ideología de la modernización, en tanto evocación relativamente abstracta y generalizadora, es la zanahoria que se ha venido proponiendo en los últimos años como meta deseable al conjunto de la sociedad española, legitimando los proyectos sociales de determinados sectores. La capacidad evocadora del concepto ha conseguido captar los deseos y expectativas de un amplio conjunto social, movilizándolo tras los proyectos que en cada coyuntura proponían los grupos de poder como vía de acceso al selecto club de los países ‘modernos’. No importa cuáles sean las consecuencias sociales inmediatas (desigualdad, exclusión social), el fin soñado las justifica o las hace soportables»³³.

El argumento de la “única política posible”, es decir, el de la única vía de *modernización económica (capitalista)*, estaría presente a lo largo de todas las legislaturas socialistas, impregnando el discurso gubernamental de un fuerte economicismo en sus diversas vertientes³⁴. Asimismo, como avisarían los técnicos, los políticos y los propios economistas,

problemático del asunto es que planteamientos teóricos de tal ‘calibre’ sean dominantes en el torno de las ciencias sociales de cara a la reconstrucción de procesos históricos extremadamente complejos.

³⁰ GIL CALVO, Enrique, *La mujer cuarteada*, Barcelona, Anagrama, 1991, p. 35.

³¹ Bajo el término de la modernización igualmente se ha creado toda una ideología identificada con una serie de valores ‘supuestamente alternativos’ como los señalados por James PETRAS: «Regime ideologies sense the desire among Spaniards to escape from the traditional constraints of the past, repressive personal constraints as well as those imposed by authoritarian institutions. Modernity connotes the promise of alternative, freer life-styles, greater opportunity from class rigidities, and access to a larger variety of consumer goods [...]. Modernity is the ideology of the upwardly mobile professionals, as well as it is their ideological justification». PETRAS, James, “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y id. (eds.), *Mediterranean Paradoxes...*, *op.cit.*, p. 116.

³² CAFAGNA, Luciano, “Modernización activa y modernización pasiva” en CARNERO, Teresa (ed.), *Modernización, desarrollo político...*, *op.cit.*, pp. 221-234.

³³ COLECTIVO IOE, “La ideología de...”, *op.cit.*, p. 78.

³⁴ El dirigente socialista Joaquín Leguina criticaría en numerosas ocasiones el discurso de ‘no hay otra política económica posible’ como ya se dejará planteado en el apartado “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”. De la misma opinión sería el buen conocedor del socialismo en estos años, Cándido: «La culminación llegaba con la destreza de las explicaciones técnicas. Nada de tartamudear disculpas inverosímiles al estilo del que roba una gallina y le cacarea en el saco. Nada de eso. Evaluaciones macroeconómicas (¡la pasión más sensual de Felipe González!), regulaciones coyunturales, absorción funcional de las tasas de crecimiento, instrumentación recíproca entre lo público y lo privado, además de otras profesionalizadas expresiones de los *arcana imperii*. Y luego de crear aquellas nebulosas

este camino no sería fácil sino que, por el contrario, exigiría “un importante sacrificio colectivo y solidario”³⁵. La instrumentalización de este discurso, a su vez, sustentaría otro de los argumentos centrales de los gobiernos socialistas, debido a que estos en ningún caso serían los responsables de las drásticas medidas a aplicar, ya que éstas constituían los pasos imprescindibles en el trayecto hacia la modernidad.

Esta estrategia, planteada tanto como “diagnóstico” como “pronóstico” a los problemas de España, se caracterizó además por la imposibilidad de crítica u oposición político. Aun a *riesgo* de una contundente *deslegitimación política*. Más aún teniendo en cuenta la considerable amplia mayoría social volcada en este proyecto para el que no se escatimarían medios ni recursos. *¿Qué fuerza política, sindical o social podrían oponerse a la modernización?* En caso de darse este supuesto, llevaba aparejada la rápida acusación ya no de ser no “moderno” sino de ser declarado enemigo del único camino que nos llevaría a superar nuestros *fantasmas* recientes.

Con el paso del tiempo, la que sería una de las posibles estrategias políticas y económicas por las que el socialismo pudo navegar, se terminaría por trocar en una poderosísima ideología del poder político. A saber, de un *partido*, de un *gobierno*. El PSOE terminaría por asociar su propio devenir con el proyecto de la modernización. Con un punto de utilidad añadida. Pues la fortaleza de esta ideología residió en “el desinterés por definir la meta final de este proceso de cambio social”³⁶.

A partir de ahí, la única similitud que el socialismo y la estrategia de la modernización compartirían, era que las metas de ambos proyectos se podrían alcanzar en un futuro más cercano o lejano. Sin mayores precisiones. Sustituida la *utopía socialista* por un proyecto realista más “acorde” con la *realidad española*, y llegado a un *punto de no retorno*, la modernización como *paradigma* y como *ideología*, es decir como forma de entender y ejercer la política, vendría para quedarse dentro del imaginario colectivo compartido del socialismo español. La apuesta fue arriesgada pero persistente en el tiempo.

Asumido el nuevo y flamante proyecto emancipador, en un breve *lapso* de tiempo y con menos resistencias de las esperadas, el mismo ya se encargaría de proporcionar los necesarios ropajes identitarios del PSOE. Todo ello acompañado de una cuestión no menor de la que se hablará largo y tendido: la idea de ser portadores de una «misión histórica». La gran tarea de los socialistas consistirá, una vez fracasados los proyectos de la derecha política, en ser necesariamente el agente, o si se prefiere el *sujeto histórico*, de la revolución burguesa pendiente del país. Según esta lectura la transformación socialista no sería posible sin antes alcanzar una fase previa: una sociedad burguesa moderna y democrática de cara a afrontar el siglo XXI. Llegada esta fase histórica pudiera darse el siguiente paso aunque no se aseguraba. Sin embargo, la cosa terminó ahí, continuó después de la derrota electoral de 1996. Desplazados del poder, justamente, por una derecha también con aires modernizadores, tocaría, en adelante, apropiarse, por los medios y fines que fueran necesarios, de la ideología de la modernización. En esta labor, desde las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 hasta el presente vivido, el PSOE no ha dejado de poner todo su empeño en ser su único depositario.

Más allá de lo planteado por parte de la historiografía y otras ciencias sociales, la *reescritura* de este periodo por parte de medios afines, cercanos o procedentes de la propia organización socialista –a modo de historia “oficial” y “militante”– no han dejado de remarcar

lingüísticas se iban de vacaciones, pues, como dijo el sabio, de la vacación de los grandes valores nace el valor de las grandes vacaciones. El daltonismo ético era la señal del tiempo». CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, *op.cit.*, p. 275.

³⁵ AHFFLC, PSOE-CE, “Documento de estrategia”, Madrid, octubre de 1983, sig. AI-647-08, p. 6.

³⁶ SOLÉ, Carlota, *Modernidad y modernización...*, *op.cit.*, p. 253.

la identificación del PSOE, y con él, del gobierno socialista, con el “partido/gobierno de la modernización”³⁷.

La construcción de esta singular memoria colectiva en donde todos estos elementos se han aunado, ha terminado deformando lo que fueron los propios hechos históricos. Una *memoria*, ante todo, caracterizada por la ausencia de cualquier tipo de (auto)crítica. Ahora bien, por un lado, deben distinguirse el papel jugado por los intelectuales y académicos del entorno del PSOE –lo que definiríamos como los “soportes intelectuales del socialismo español” – y por otro lado, lo que la organización como tal realizó en este sentido. Así pues, ha de tenerse presente el papel desarrollado por el propio PSOE como *actor de rememoración*.

Si el PSOE pueda ahora ser considerado como el *partido de la modernización*, no lo es en ningún caso porque cierta literatura propagandística lo señale con mayor o menor fervor. Fueron sus actuaciones y su forma de entender y hacer política, junto con sus señas de identidad, su cultura política y su proyecto programático, las que llegado el caso pueden otorgarles esta ansiada “calificación”. Si esto fue así y no de otro modo dependió de unas actuaciones concretas protagonizadas por este *sujeto histórico de cambio*, pero en ningún caso fue obra y gracia de una supuesta e improrrogable *misión* que la historia encargó a la organización socialista. Corresponde, por tanto, interrogarse por lo siguiente: ¿qué factores intervinieron en la configuración ideológica, programática y estratégica del socialismo español, para que, en un breve periodo de tiempo, el PSOE pasara de ser un partido radical, marxista y de clase a convertirse en el partido garante de la modernización y de la consolidación de la democracia española?

4.2. La particular transición socialista hacia el poder político

Mucho se ha discutido como un partido prácticamente desaparecido durante el franquismo, cuya presencia dentro de la oposición antifranquista fue, en la práctica, irrelevante, en tan sólo el tiempo que media entre el fallecimiento del dictador hasta las primeras elecciones democráticas, un 15 de junio de 1977, pudo llegar a ser en la segunda fuerza política más votada. A la hora de discernir en torno a este interrogante, se nos aparecen múltiples elementos *internos* a la organización y *externos* al socialismo español. La mayoría de ellos son de sobra conocidos, en cambio, otros no lo son tanto. Precisamente estos últimos factores que enlazan con el papel que el PSOE decidió jugar en este tiempo de cambios políticos y económicos son los que nos pueden abrir el camino para explorar la particular transición socialista.

La transformación del socialismo español ha tratado de explicarse por la renovación o la refundación del PSOE, así como por la interiorización de la organización, el cambio generacional o el *declinar* de la radicalización posibilista del discurso político. De hecho se ha planteado como la nueva configuración ideológica que adquirió el PSOE entre 1972/74-1982, estaría en consonancia con los acontecimientos históricos acaecidos, entre el fin de la dictadura franquista y el inicio de la construcción del régimen democrático. Igualmente no han faltado los argumentos que han explicado la marcha atrás en la mayoría de los “utópicos” proyectos socialistas por la presión de la Internacional Socialista, así como por la crisis del marxismo en estos mismos años. Tampoco han faltado todo tipo de acusaciones denunciando la acomodación de los dirigentes socialistas. El *menú* de hipótesis es amplio y variado.

4.2.1. La consolidación de una *nueva coalición de poder* (1972-1977)

«La característica fundamental del socialismo en el sur de Europa es la oscilación entre la política del cambio y las exigencias del conformismo: la necesidad de reafirmar el principio de autonomía

³⁷ Nos remitimos aquí a lo planteado en el apartado “2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: entre la historia oficial/militante y la literatura partidista y otros materiales de estudio”.

de acción y la necesidad de garantizarse recursos económicos del Estado».

James PETRAS, *La socialdemocracia del Sur de Europa*³⁸.

Desde que en agosto de 1972 una *nueva coalición del poder* encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra se hiciera con la dirección política del PSOE en el XXV Congreso – en concreto, los días del 13 al 15–³⁹, el *partido* iniciaría su “particular transición”⁴⁰. Una transición política de carácter generacional y de naturaleza traumática. El problema mayor en estos años fue el de transformar, en un breve periodo de tiempo, un pequeño partido con escaso peso en el panorama de la lucha anti-franquista y desaparecido en la mayor parte del Estado, en una organización político-electoral con capacidad de influir en los ámbitos de toma de decisiones.

La trayectoria del PSOE finalizada la Guerra Civil sería, al igual que otros muchos partidos, el camino del exilio en el que se formaría y se consolidaría una dirección política instalada en Toulouse y encabezada durante muchos años por el Secretario General –casi vitalicio– Rodolfo Llopis⁴¹. De este modo, desde el fin de la contienda civil hasta el año 1972, el

³⁸ PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, *op.cit.*, p. 12.

³⁹ Aquella Comisión Ejecutiva entrante en el 12º Congreso del Exilio será, de hecho, la última en donde se mantendría una dirección doble entre el *exterior* y el *interior*. Asimismo, sería la primera vez desde el 1º Congreso del Exilio en donde Rodolfo Llopis no ocuparía la Secretaría General. Su composición sería la siguiente: *en el exterior*: Secretario de Organización, Juan Iglesias; Secretario Administrativo: Fernando Gutiérrez; Secretario de Propaganda, Arsenio Jimeno; Secretario de Relaciones, Francisco López Real; Secretario de Formación del Militante, Carmen García Bloise; *en el interior* –y sin especificación de cargos– Nicolás Redondo, Felipe González, Pablo Castellano, Enrique Múgica, Ramón Rubial, Luis Alonso Novo, Guillermo Galeote, Eduardo López Albizu, Agustín González, Alfonso Guerra. Previamente existía lo que se conocía como la “representación del interior” de las propias comisiones ejecutivas en el exilio. Así entre 1967 y 1970, estarían: Ramón Rubial, Enrique Múgica, Cristóbal Cáliz Almirón, Miguel Peydro Caro, Antonio Ramos Argüelles, Agustín González y Juan Vives. Y entre 1970 y 1972, Ramón Rubial, Nicolás Redondo, Enrique Múgica, Eduardo López Albizu, Agustín González, Felipe González, Basilio Rodríguez Gómez, Joaquín Jou i Fonolla y Cristóbal Cáliz Almirón sustituido este último por Pablo Castellano. Datos procedentes de, MARTÍN NAJERA, Aurelio, *Partido Socialista Obrero...*, *op.cit.*, pp. 45 y 38, respectivamente.

⁴⁰ La numeración de los congresos socialistas se modificó una vez finalizada la guerra civil. Instalada la dirección socialista en Toulouse en 1944 se celebraría el I Congreso del PSOE en el Exilio – también conocidos como los congresos de “Expatriación” – hasta el XIII Congreso en Suresnes en 1974. A efectos de simplificación aquí se seguirá el computo de Congresos del PSOE desde su fundación – concretamente el primero se celebró en 1888 en Barcelona y en donde Pablo Iglesias sería elegido presidente del Comité Nacional– hasta la actualidad. De este modo, para el periodo que aquí nos interesa las correspondencias son las siguientes: XXV Congreso celebrado en 1972 en Toulouse correspondería al XII Congreso del Exilio; XXVI Congreso celebrado en 1974 en Suresnes correspondería al XIII y último Congreso del Exilio. A partir de ahí, y una vez celebrado el XXVII Congreso socialista en Madrid en diciembre de 1976, la numeración de los mismos recuperarían su ‘normalidad’.

⁴¹ Sobre dicho Secretario General del PSOE, quien estaría en el cargo entre 1944-1974, hasta el momento pocos han sido los trabajos en relación a su trayectoria política y biográfica. Entre otros pocos: VARGAS, Bruno, *Rodolfo Llopis (1895-1983): una biografía política*, Barcelona, Planeta, 1999. Véase asimismo, *Homenaje a Rodolfo Llopis Ferrándiz*, Madrid, Comisión Ejecutiva Confederal de FETE-UGT, 2009. El Archivo Histórico de Rodolfo Llopis se encuentra depositado en la Biblioteca Gabriel Miró en Alicante. Por lo demás, tras ser ‘defenestrado’ fundaría el Partido Socialista Obrero Español (Sector Histórico) [véase, MURILLO, Manuel, *PSOE (s.h)*, Madrid, Albia, 1977]. Fuerza política que tendría unos pobres resultados en las sucesivas convocatorias electorales así como una escasa relevancia en el panorama político. Por último deben destacarse dos notas. La primera, en este caso concreto, es el proceso de *dulcificación de la memoria* que el PSOE, de la mano de la Fundación Pablo Iglesias, ha realizado en los últimos años en torno al propio ‘exilio socialista’. Ejemplo significativo de ello fue la exposición “El exilio español (1936-1978)” organizada precisamente por la Fundación Pablo Iglesias en el año 2002. La segunda, y no menos peculiar, ha sido el retraso con que han llegado los reconocimientos

PSOE debe ser definido, tal como lo ha hecho el profesor Santos Juliá, como un *partido en el exilio*⁴².

Durante todos estos años, la nueva dirección del interior tuvo por objetivo básico la supervivencia de la organización y de la cultura socialista⁴³. Todo ello la espera de que el régimen se desplomara. Lo anterior formaba parte de una fuerte convicción interna por parte de los veteranos cuadros del PSOE con sus correspondientes derivaciones estratégicas. Sus principales representantes del exilio siempre sostuvieron que con la vuelta a las libertades democráticas, el valor de las siglas del PSOE sería más que suficiente para el renacimiento del Partido. Razón por la cual siempre se mostraron más preocupados en preparar la transición que en acabar con el franquismo⁴⁴. No se equivocaron en lo básico, aunque el camino trazado sería muy diferente del inicialmente previsto.

La estrategia de la dirección instalada en Toulouse se mostraría con el paso de los años profundamente negativa, tanto en la evolución política y orgánica del PSOE así como en su escasa *aportación* en la lucha contra la dictadura. Acercarnos a la propia documentación interna del PSOE revela el proceso de degradación que se llegaría a alcanzar. Hasta el punto de que la posibilidad real de desaparecer no se descartaba a la altura de 1971:

«El Partido no puede ni debe reducir sus actividades. El P. no puede ni debe resignarse a vegetar. En ningún momento. Ahora menos que nunca»⁴⁵.

del propio PSOE a la dirección socialista en el exilio, incluyéndose aquí a los propios dirigentes que fueron expulsados durante los años cuarenta. Buena parte de los mismos realizados a partir del año 2008 y 2009. Véase este proceso de recuperación de la memoria histórica socialista en, por ejemplo, Noticia, “Alfonso Guerra asiste al homenaje de Toulouse al PSOE en el exilio”, *Agencia EFE*, 27 de junio de 2009. O más concretamente en la resolución aprobada en el XXXVII Congreso socialista, en octubre de 2008, donde el PSOE readmitiría a título póstumo a más de una treintena de dirigentes (Juan Negrín, Julio Álvarez del Vayo, Max Aub...). Ahora bien, aprobada la citada resolución congresual el citado acto de readmisión simbólico-legal, por ejemplo, en el caso de Negrín tardaría en llegar más de un año. Noticia, “El PSOE readmite a Juan Negrín 63 años después de su expulsión”, *Público*, 23 de octubre de 2009.

⁴² JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 327.

⁴³ Una revisión sobre los posicionamientos políticos e ideológicos en aquellos años en, DÍAZ, Elías, “Pensamiento socialista durante el franquismo” en JULIÁ, Santos (coord.), *El socialismo en...*, *op.cit.*.

⁴⁴ Sobre este proceso, GÁLVEZ BIESCA, Sergio y MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “Las contradicciones del socialismo: una aproximación a la historia política del PSOE en la Transición (1972-1986)” en *La transición a...*, *op.cit.*.

⁴⁵ La cada vez más evidente fractura entre las posiciones *no aperturistas* y renovadoras de la dirección del Interior encabezada por Llopis, llegaría a su punto culmen durante la preparación del XII Congreso [XXV Congreso] que se celebraría en agosto de 1972. Con la dirección del exterior acorralada ante el empuje de los nuevos dirigentes socialistas, se reconocía abiertamente que: «que la Comisión Ejecutiva no ha ocultado a nuestros afiliados que existe en el Partido una crisis profunda. Dentro y fuera de España. Y lo hemos dicho sin pasión, con la esperanza de que todos y cada uno de los afiliados hiciesen examen de conciencia y pudiesen demostrar que a su amor a las ideas y su amor al Partido estaban por encima de toda preocupación subalterna». AHFPI, AE, PSOE-CE, “Circular nº 16”, Toulouse, 17 de julio de 1972, sig. AE-117-3, p. 1. Del mismo modo, aquella circular revelaba la situación de degradación política en la que se encontraba la dirección del exterior. Una degradación también a nivel *personal* por parte del Secretario General, quien ante la posibilidad de poder perder el control del Partido avisaba a través del citado documento: «Existe actualmente en el Partido una gran confusión y un profundo malestar que perturban seriamente sus actividades, cuando no las paralizan. Ese profundo malestar y esa gran confusión se han ido manifestando a través de los episodios que acabamos de recordar a lo largo de esta Circular. Pero en realidad, se exteriorizó por vez primera, públicamente en el undécimo Congreso del Partido, en agosto de 1970. Hasta aquel congreso, la cordialidad y la confianza mutua entre los Ejecutivos del interior y del exterior eran completas. Pero en ese congreso, los dirigentes del interior descubrieron ya sus afanes de predominio en la dirección del Partido, alentados por algún que otro resentido del exterior». Y añadía finalmente su negativa a la posibilidad de que el Congreso

En esta situación sin salida había pesado la política de alianzas mantenidas durante cerca de tres décadas. El anticomunismo declarado de la dirección socialista estuvo en gran medida en la raíz del problema⁴⁶. El recuerdo tormentoso sobre cómo había finalizado la Guerra Civil, y más aún tras el golpe de Casado, marcaría de forma permanente las actuaciones para la creación de una política de alianzas con posibilidades reales de oposición a la dictadura⁴⁷. A lo

convocado finalmente se celebrará. Todo ello bajo la siguiente *amenaza*: «Esa es nuestra decisión. Si a pesar de lo que acabamos de escribir, se celebrase el congreso, convocado por una parte del Partido, nos veríamos en el caso de declarar faccioso dicho congreso. Y advertimos a quienes asistan que por el hecho de asistir a dicho congreso, se colocan fuera de la disciplina del Partido y que procederemos en consecuencia» (p. 7).

⁴⁶ La *generación* del ‘exilio socialista’ se refundó en torno a un discurso cuya seña principal de identidad sería su *militante anticomunismo*, lo que le conduciría a una larga y peligrosa parálisis política-organizativa, y a rechazar cualquier tipo de estrategia de movilización de masas como sumamente peligrosa [véase aquí, AHPFPI, AE, PSOE-CE, Rodolfo Llopis, Asuntos políticos y organización, “El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista Español. Acuerdos de nuestro Congreso”, Toulouse, 1966/1967, sig. AE-634-39]. De hecho, en el 2º Congreso del Exilio (17-20 de abril de 1946) se llegaría a afirmar: «En cuanto al Partido Comunista, después de examinar con minuciosidad la conducta seguida [...] salpicada con dolorosa frecuencia de agresiones que van desde la injuria y la calumnia hasta la agresión personal y al asesinato contra nuestros compañeros y contra el partido nuestro, el PSOE mantendrá su posición actual de negativa a entrar en relaciones con él» [extraído del “Dictamen de la Ponencia de Relaciones con otros partidos y organizaciones durante el IIº Congreso del Exilio, 1946” en, MARTÍNEZ COBO, Carlos y MARTÍNEZ COBO, José (coord./recop.), *Congresos del PSOE...*, *op.cit.*, vol. I, p. 36]. Aquellas tesis fueron evolucionando de forma negativa con el paso de los años, llegándose a situaciones paranoicas. *Situaciones* que respondían, en resumen, a la realidad de una organización aislada. Una firme actitud que se mantuvo a lo largo del tiempo y que a la menor ocasión propiciaba no pocas tensiones internas. Ejemplo de lo anterior sería la puntual ocasión de colaboración – que, sin embargo, no iría más allá de pequeños contactos– de comunistas y socialistas en relación al ‘Proceso de Burgos’ (1970). Motivo más que suficiente para que la dirección socialista en el exilio se viera en la obligación de enviar una larga e inusual *circular*, en donde se revisaba, punto por punto, la política de alianzas con los ‘comunistas’. Tras recordar los acuerdos aprobados en los Congresos se preguntaba a continuación la propia circular: «¿Han cambiado esencialmente los Partidos Comunistas?» o «¿Ha cambiado el Partido Comunista Español?». Realizadas las *consignas anticomunistas* oportunas se volvía a remarcar que, bajo ninguna circunstancia, se podía llegar a acuerdos «concretos» y «[c]uando haya de hacerse un llamamiento general, se hará separadamente». A juicio del propio PSOE aún no se habían recabado las *pruebas suficientes* que probarán la rectificación del PCE [AHFPI, AE, PSOE, Secretaria General, “Circular, nº 6”, Toulouse, enero-febrero de 1971, sig. AE-117-2, pp. 2-6]. Meses más adelante se profundizaría en esta política de alianzas o mejor dicho de no alianza con el ‘Partido del antifranquismo’. El motivo: los cada vez más frecuentes contactos de los socialistas del interior con los propios comunistas. Una política o *no* política, como se prefiera, que se mantendría hasta la ruptura socialista anunciada [aquí junto a las *circulares* ya citadas, primero, véase: AHFPI, AE, PSOE, Secretaria General, “Circular nº 10”, Toulouse, 2 de noviembre de 1971, sig. AE-117-3]. «¿Adónde vamos? ¿Que se persigue? ¿Poner al Partido a remolque del Partido Comunista? Debemos hablar claro de una puñetera vez», señalaría, por ejemplo, Arsenio Gimeno, Secretario de Prensa y Propaganda [AHFPI, AE, PSOE, Secretaria de Organización, “Carta de Arsenio Gimeno a Juan Iglesias”, 6 de julio de 1976, Toulouse, 6 de junio de 1973, sig. AE-629-2, p. 1]. Debe añadirse que aquellas *circulares* y cartas personales dan cuenta, en suma, de los aislados movimientos socialistas en el interior así como de las *pequeñas miserias* organizativas tan habituales por parte de la dirección del exterior. Por último, la normalización de las relaciones con el PCE no llegaría hasta la llegada de la nueva coalición de poder dentro del PSOE. Tan sólo, sería a partir de entonces cuando delegaciones de ambos partidos comenzaran a reunirse con periodicidad. En todo caso, en contadas ocasiones se llegaría a acuerdos concretos. Igualmente consúltense, AHFPI, AE, PSOE-CE, Secretariado de Organización, “Carta a todos los miembros del Comité Nacional”, Toulouse, julio 1975, sig. AE-690-5; AHFPI, AE, PSOE, Secretaria de Prensa y Propaganda, “Información Socialista, nº 6”, 8 de abril de 1975, sig. AE-638-06; AHFPI, AE, PSOE-CE, “Boletín interno del PSOE nº 3. Reservado para los afiliados”, agosto de 1976, sig. AE-687-10; o AHFPI, AE, PSOE, Primera Secretaria, “Circular nº 29”, Madrid, 9 de abril de 1976, sig. AE-712-33.

⁴⁷ En cuanto a esta cuestión nos remitimos, primero, a los trabajos contenidos en: BUENO LLUCH, Manuel, HINOJOSA, José y GARCÍA GARCÍA, Carmen (coords.), *Historia del PCE...*, *op.cit.*; y, dentro de

anterior se sumo otro *factor* de mayor importancia estratégica: su alejamiento progresivo de la realidad política y social de la España del franquismo⁴⁸.

Mientras que el fracaso de su tibia política antifranquista se hacía cada vez más evidente, la inicial aparición de unas *nuevas generaciones socialistas* en el XII Congreso en el Exilio, se terminaría por convertir en la válvula de escape de un PSOE agonizante. La llegada de la siempre recordada *nueva generación* socialista daría paso a una de las escisiones claves de la familia socialista en toda su larga y dilata historia⁴⁹. Forjadas en la lucha interior contra la dictadura comenzaron a reactivar las prácticamente desaparecidas federaciones socialistas, asumiendo, desde el primer momento, los nuevos tipos de lucha contra la dictadura, que, a partir de los años sesenta, se habían ido desarrollando –con mayor o menores éxitos, según el momento político como la región concreta⁵⁰– por parte de la oposición antifranquista⁵¹.

esa obra colectiva: GÁLVEZ BIESCA, Sergio y MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “Historia de una colaboración y competición política durante el franquismo: las relaciones del PCE-PSOE (1944-1974)”.

⁴⁸ Frecuentes fueron las críticas contra la estrategia dirección del exilio por parte de los nuevos dirigentes socialistas del interior. Entre las más conocidas se puede citar un conocido *informe* de Pablo Castellano en una fecha clave en la historia del PSOE como fue el año 1972. Allí denunciaba la raquítica y desacertada gestión política llevada desde el ‘aparato burocrático’ del exilio. Concentrando todos sus ataques en la figura de Rodolfo Llopis, al que acusaba de haber sustituido el *socialismo* por el *llopismo*: «Así fueron transcurriendo los años desde 1939 y ya al principio de la década de los años 60 empezaron a producirse tensiones entre los militantes del Interior y del Aparato Burocrático radicante en el exilio, tensiones que a su vez tenían reflejo en la propia idea de la Organización fuera de nuestras fronteras. Tanto los militantes del Interior como disconformes del exilio empezaban a estar incómodos y molestos con la vitalicia Secretaria General de Rodolfo Llopis al que unos y otros acusaban de haber sustituido el socialismo democrático por el Llopismo, de no tener el menor interés en que la Organización en el interior prosperase y se hiciese fuerte, por si acaso ello suponía el fin de su hegemonía, de olvidar que el Partido de Clase de profunda raíz revolucionaria tenía que tener la vista puesta en la clase obrera que en alianzas y maniobras con figuras más o menos resonantes de la oposición burguesa y monarquía española». AHFPI, AE, PSOE-CE, “Asuntos políticos y orgánicos. Informe de Pablo Castellano”, 1972? sig. AE-634-19, p. 2.

⁴⁹ Véase, MATEOS, Abdón, *El PSOE contra...*, *op.cit.*, y en concreto el epígrafe “4. VI. La escisión del PSOE”, pp. 433-444.

⁵⁰ El *resurgir* del nuevo movimiento obrero –de la mano, principalmente, de las Comisiones Obreras– en la España bajo el franquismo obedece a un *sin fin* de razones y causas difícilmente sintetizables en unas pocas líneas. Al menos téngase presente que el punto de *origen* dependió de cada región y localidad así como de ciertas *tradiciones* y *memorias generacionales*, además, claro está, de la situación laboral de cada zona. A ello se sumaría diferentes formas de organización junto con muy variadas herramientas de lucha dependiendo del caso al que prestemos atención. Ahora bien, el elemento *unificador*, leído a su vez en términos históricos de *ruptura*, sería que este *nuevo* movimiento obrero renunciaría a la *lucha armada*. Véanse aquí los estudios de caso de Madrid, Asturias, Barcelona, Bilbao o de Valencia, entre otros posibles en: BABIANO, José, *Emigrantes, cronómetros y...*, *op.cit.*; BALFOUR, Sebastian, *La dictadura, los...*, *op.cit.*; VEGA, Rubén (coord.), *El camino que...*, *op.cit.*; PÉREZ PÉREZ, José Antonio, *Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001; y, GÓMEZ RODA, Alberto, *Comisiones Obreras y represión franquista: València, 1958-1972*, Valencia, Universitat de València, 2004, respectivamente. Una visión actualizada de conjunto en, DOMÈNECH, Xavier, *Cambio político y...*, *op.cit.*. Un estado de la cuestión, junto con lo apuntado en el apartado “3.3. Debates, lecturas, controversias en torno al *nuevo* movimiento obrero en la España en la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos”, en GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delinquentes políticos...*, *op.cit.*.

⁵¹ Las nuevas generaciones socialistas surgieron principalmente en los núcleos industrializados como Cataluña, Madrid, Sevilla, Asturias y el País Vasco. Véase aquí, PEYDRO CARO, Miguel, *Las escisiones del PSOE y los intentos de reunificación*, Barcelona, Plaza & Janés, 1980.

La conquista de la dirección por parte de “las nuevas generaciones” socialistas se consumaría en el siguiente de los Congresos del PSOE celebrado los días 11, 12 y 13 de octubre de 1974 en Suresnes. *¡Por el socialismo! ¡Por la libertad!* sería el eslogan elegido para la ocasión. XIII Congreso que se transformaría en el de la escisión socialista. Con el aval de la Internacional Socialista por delante⁵², se asistiría al nacimiento del liderazgo de Felipe González⁵³. Por este camino, los recién ascendidos dirigentes fueron conscientes de la necesidad de transformar todas las estructuras del partido siempre que se mantuviera “el consenso sobre la identidad del PSOE” –su Programa Máximo⁵⁴– “el objetivo político a corto plazo” –la ruptura democrática⁵⁵– y su papel político en la historia de España –ser la organización protagonista de los cambios–⁵⁶. Incluido aquí una nueva concepción de las políticas de acción unitaria con el resto de las fuerzas de la oposición antifranquista⁵⁷. Sin duda alguna aquel Congreso, en suma, supuso un impulso necesario para la vigorización del socialismo como ha afirmado el mismo Alfonso Guerra: “[y]o tuve mis dudas de que después de cuarenta años el partido fuera a recuperar su protagonismo [...]. Pero cuando se celebra el Congreso de Suresnes yo estaba convencido de que cualquier duda estaba superada”⁵⁸.

⁵² ORTUÑO ANAYA, Pilar, *Los socialistas europeos...*, *op.cit.*. Consúltense asimismo: DEVIN, Guillaume, *L'Internationale socialiste: histoire et sociologie du socialisme international (1945-1990)*, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1992.

⁵³ Véase aquí las tesis mantenidas por, APARICIO GARCÍA, Santiago, *El liderazgo político...*, *op.cit.*.

⁵⁴ El ‘Programa Máximo’ se redactó en los primeros años de vida del PSOE –consúltense el *Manifiesto de los Delegados del Primer Congreso del PSOE* de 25 de agosto de 1888– en donde se establecieron como objetivos finales del socialismo la emancipación de la clase obrera, a la vez que se definía al PSOE como un partido de clase y de inspiración marxista. Así, por ejemplo, en el XXVII Congreso de 1976 en el punto uno de la ponencia política, y concretamente en el apartado de principios se señalaba: «1º.- El PSOE tiene un texto fundamental: su programa máximo que por seguir totalmente vigente, constituye la base de todo nuestro pensamiento y acción, y debe ser un elemento esencial en la divulgación de lo que es nuestro Partido. Pero parece conveniente para facilitar, precisamente, dicha divulgación el concretar ideas claras de dicho texto en una serie de explicaciones claras y accesibles». AHFFLC, Fondo Saracibar, PSOE, “Dictamen Ponencia Política. XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1976”, Madrid, 7 de diciembre de 1976, sig. 002264-001, p. 1.

⁵⁵ Se decía en la 4ª Tesis de la *Resolución Política* de aquel congreso: «4.- El P.S.O.E. considera que la única salida a la presente situación consiste en la adecuada formulación de una ruptura democrática, en el restablecimiento definitivo de un sistema de libertades y la construcción de un sistema de gobierno que emane de la voluntad soberana del pueblo”. AHFFLC, Fondo Saracibar, PSOE, Secretaría de Formación, “Resoluciones del XIII Congreso del P.S.O.E. (Suresnes, octubre 1974)”, sig. 002265-003, p. 2. Aquí de notable interés es el trabajo en de, PARAMIO, Ludolfo, “El bloque dominante...”, *op.cit.*.

⁵⁶ La composición de la Comisión Ejecutiva sería la siguiente: Primer Secretario, Felipe González; Secretario de Organización, Nicolás Redondo; Secretario de Coordinación, Enrique Múgica; Secretario de Prensa e Información, Alfonso Guerra; Secretario de Propaganda, Guillermo Galeote; Secretario Internacional, Pablo Castellano; Secretario de Formación, Francisco Bustelo; Secretario de Administrativo, Eduardo López Albizu; Secretario Sindical, Agustín González; Secretario de Juventudes, José María Benegas; Secretario de Emigración, Juan Iglesias Garrigos. Datos procedentes de, MARTÍN NAJERA, Aurelio, *Partido Socialista Obrero...*, *op.cit.*, p. 45.

⁵⁷ Véase, AHFPI, AE, PSOE, Circulares, “Proyecto de declaración política”, 1974?, sig. AE-712-32, en donde ya se podía observar pequeños pasos de cara a la ruptura con la dirección del interior en aspectos tan importantes como la política de alianzas: «El P.S.O.E. considera necesario un acuerdo limitado de todos los grupos políticos democráticos y antifranquistas representantes de la clase trabajadora y de la burguesía sin exclusión alguna, como alternativa democrática al pueblo español para la devolución a éste de su soberanía y de las libertades democráticas» (p. 3).

⁵⁸ Declaraciones de Alfonso Guerra a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, p. 129.

La estrategia socialista naciente estaría marcada en esta primera etapa tanto por el contexto de debilidad política que venía arrastrando, como por la progresiva adaptación a los cambios institucionales que se producirían en breve⁵⁹. En este tiempo, que media entre este mismo Congreso y el celebrado en diciembre de 1976, adquirirá la “etiqueta” de radical. Si por *radical* se entiende un partido marxista, que aspira a “la radical transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista” y exige el “reconocimiento del derecho de autodeterminación de todas las nacionalidades ibéricas”, entre otras cuestiones no menores⁶⁰.

Se confirmaba y se cerraba a su vez la primera de las rupturas traumáticas que acompañarían al socialismo español en los siguientes años. Una *ruptura* que no estuvo exenta de momentos dramáticos entre la dirección del exilio y la del interior. Pues cada una de las partes enfrentadas entendía que se estaba poniendo en peligro la propia existencia del Partido. No fueron pocas las llamadas al *patriotismo de partido* por cada una de las partes⁶¹. Para la ejecutiva del exilio con escasa confianza en los nuevos cuadros socialistas, la *interiorización* del partido podía hacer caer en manos de la policía toda la organización. Por el contrario, los renovadores destacaban el espacio político que había perdido el PSOE durante los últimos años, habiendo sido sustituidos por otros grupos como el PCE.

El nuevo diseño estratégico del PSOE le hizo recuperar en relativamente poco tiempo el espacio político perdido. Proceso este que se aceleraría tras el fallecimiento del dictador, cuando socialistas de todos los lugares, profesiones y orígenes comenzaron a aparecer por vez primera tras un largo tiempo. Más lento sería el proceso de superación de su parálisis organizativa.

Clarificar su papel en la lucha contra el régimen se constituyó en la primera de sus prioridades políticas. El principal problema a resolver en este periodo de tiempo estribó en la necesidad de diferenciarse, tanto en la estrategia política como en lo programático, de lo que PSOE entendió, incluso en tiempos de la dictadura, como su principal competidor político: el PCE. La hegemonía de este último en la lucha contra el franquismo, junto con su giro hacia el eurocomunismo, habían borrado las principales diferencias políticas y programáticas entre ambos⁶². PSOE y PCE coincidían a mediados de los setenta “en el sujeto del proyecto (un gran

⁵⁹ Véase, AHFPI, AE, PSOE-CE, “Memoria de gestión que presenta la Comisión Ejecutiva [al] XIII Congreso”, Suresnes (Francia), 1974, sig. A 3916.

⁶⁰ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE, Secretaria de Formación, “Resoluciones del XIII Congreso del P.S.O.E. (Suresnes, octubre 1974)”, Suresnes (Francia), 1974, sig. 002265-003, p. 2, en concreto se cita la *Tesis* 1º y 5ºg de la *Resolución Política*. Con respecto a la última cuestión se añadía en la “Resolución sobre las nacionalidades ibéricas”: «2) Al analizar el problemas de las diversas nacionalidades el P.S.O.E, no lo hace desde una perspectiva interclasista del conjunto de la población de cada nacionalidad, sino desde una formulación estratégica de clase, que implica que el ejercicio específico del derecho de autodeterminación para el P.S.O.E. se enmarca dentro del contexto de la lucha de clases y del proceso histórico de la clase trabajadora en lucha por su completa emancipación» (p. 3).

⁶¹ «Pero el PSOE [...] es una organización de amplia democracia interna. Por ello, hay que estar permanente en guardia para mantener la personalidad, la independencia y autonomía del PSOE en todo el proceso de coordinación. Tenemos que evitar la tendencia de algunos compañeros a caer, consciente o inconscientemente, en una postura entreguista, desarrollando un verdadero PATRIOTISMO DE PARTIDO, porque estamos convencidos que sólo con un PSOE fuerte, con una línea clara, con militantes decididos, la alternativa socialista y democrática tendrá posibilidades de éxito». AHFPI, AE, PSOE, “Circular nº 29. A todas las federaciones y secciones. A los miembros del CN”, Madrid, 9 de abril de 1976, sig. AE-712-33.

⁶² Remitimos aquí a, MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere, “El partido del antifranquismo (1956-1977)” en BUENO LLUCH, Manuel, HINOJOSA, José y GARCÍA, Carmen (coords.), *Historia del PCE...*, *op.cit.*, vol. II, PP. 13-32. Aportaciones fundamentales aquí por su valor teórico y estratégico son las aportaciones de, CARRILLO, Santiago, *Nuevos enfoques a problemas de hoy*, Paris, Editions Sociales, 1967; id., *Mañana, España: Conversaciones con Régis Debray y Max Gallo*, Madrid, Akal, 1976; y, id., “Eurocomunismo” y estado, Barcelona, Crítica, 1977. Por lo demás, consúltese la publicación de la tesis

bloque de clases asalariadas), en el método (vía democrática) y en el contenido (el socialismo en libertad)”, lo cual llevó aparejado el riesgo, tal como ha mantenido Antonio García Santesmases, de que un futuro contexto electoral se reprodujera el modelo italiano con un “minúsculo Partido Socialista”⁶³.

A partir de ahí, el partido socialista llevará a cabo la estrategia conocida como la “Conquista de Espacios de Libertad” –ya planteada con anterioridad por otras *fuerzas vivas* de la oposición– que se concretaría a lo largo del año 1974 a través de un triple eje: el refuerzo de la organización a través de la recuperación de las federaciones desaparecidas. A lo que se sumaron sucesivas campañas de afiliación de cara a afianzar la luchas de masas. En segundo lugar, se rediseñaría una política de alianzas en la que se conjugaría compromisos abiertos con otras fuerzas políticas, manteniendo en las nuevas plataformas de acción una postura radical basada en la *ruptura democrática*⁶⁴. Aquí también el PSOE daría a conocer su particular idea de la *reconciliación nacional* convenientemente matizada para la ocasión⁶⁵. Y en tercer lugar, se elaboraría una estrategia en el frente institucional: en base a la correlación de fuerzas, a los pasos políticos y acontecimientos que se dieran, no se descartaba llegar a pactos y acuerdos con las élites del reformismo franquista, si ello contribuía a la clarificación del proceso democrático.

El nuevo socialismo comenzó a resituarse tanto en el interior como en el exterior. El apoyo político y financiero del resto de los partidos socialistas de Europa, y concretamente del Sur, devendría en central para reforzar la imagen del PSOE y de sus principales líderes⁶⁶. En

doctoral de, ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, *El PCE y...*, *op.cit.*. De este último historiador, véase aquí también su interesante trabajo, id., “Con su propia...”, *op.cit.*.

⁶³ GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Evolución ideológica del...”, *op.cit.*, p. 62.

⁶⁴ Tal y como se planteaba en un documento de la Comisión Ejecutiva en la fecha de 1976 que, en parte, era una transcripción literal de la *resolución política* aprobada en el Congreso de 1974: «El PSOE considera que la única salida a la presente situación consiste en la adecuada formulación de una Ruptura Democrática, en el restablecimiento definitivo de un sistema de libertades y la construcción de un sistema de gobierno que emane de la libertad soberana del pueblo». Pero no sólo, pues es a través de esa misma documentación en relación a las políticas de alianzas en donde el ‘lenguaje radical’, que pasaba ampliamente por la izquierda al resto de las organizaciones antifranquistas, se puede percibir de mejor manera. Más allá de los excesos verbales de turno, por lo demás, se destacaba con evidente entusiasmo el papel de la clase trabajadora en tal lucha: «los sectores marginados del poder político, como son la clase trabajadora y la inmensa mayoría del pueblo, así como las organizaciones políticas y sindicales antifranquistas, están contribuyendo decisivamente al deterioro y liquidación del régimen político actual, a través de la lucha mantenida contra la Dictadura, lucha hoy con más militantes que nunca por ir tomando las masas explotadas más conciencia de su condición, sus derechos y sus responsabilidades». AHPFI, AE, PSOE-CE, “Informe: «Dossier político. Políticas de Alianzas»”, 1976, sig. AE-635-33, p. 18. Véase aquí también, MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “La alternativa democrática del PSOE: historia de la participación política del PSOE dentro de las plataformas de oposición antifranquista (1970-1977)” en *Actes del Congrés la transició de la dictadura franquista a la democràcia: Barcelona, 20, 21 i 22 d'octubre de 2005*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona / Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, 2005, pp. 175-184.

⁶⁵ Sobre esta cuestión nos remitimos al minucioso trabajo de, id., “La problemática del pasado y el discurso sobre la reconciliación nacional del socialismo español durante el franquismo y la primera parte de la transición: su relación con la acción política del partido” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Generaciones y memoria...*, *op.cit.*. Por lo demás consúltense, ERICE, Francisco, “Los condicionamientos del *giro táctico* del PCE en 1956: El contexto de la Política de Reconciliación Nacional” en BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coords.), *Estrategias de alianza y políticas unitarias en la historia del PCE*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 24, (2006), pp. 129-150; MOLINERO, Carme, “La política de reconciliación nacional. Su contenido durante el franquismo, su lectura en la Transición”, *Ayer*, nº 66, (2007), pp. 201-255; y, AHPCE, Documentos PCE, Comité Central del PCE, “La legalización del Partido Comunista de España, un triunfo para la Democracia y la Reconciliación Nacional”, 10 de abril de 1977, carp. 38.

⁶⁶ Los apoyos exteriores de todo tipo a la reconstrucción del PSOE constituye uno de los debates todavía por afrontar en profundidad. Mientras que en el trabajo de Pilar Ortuño –*Los socialistas*

este sentido, y aunque haya pasado las más de las veces desapercibido, tendría una notable importancia la celebración de la primera *Conferencia de los Partidos Socialistas de Europa del Sur* los días 24 y 25 de enero de 1976 en París⁶⁷. Conferencia en la que participarían el Partido Socialista Italiano (PSI), el Partido Socialista Francés (PSF), el Partido Socialista Portugués (PSP) y el Partido Socialista Belga (PSB) contando como observadores con el importante

europesos..., *op.cit.* – se limitaba a la superficialidad de los mismos sin aportar dato nuevo; por otro lado, tanto las investigaciones de Alfredo Grimaldos –*La sombra de Franco en la transición*, Madrid, Oberón, 2004; y, *id.*, *La CIA en...*, *op.cit.* – así como las muy personales memorias del socialista Antonio Saavedra –*Secuestro del socialismo...*, *op.cit.* – pondrían el acento en los apoyos recibidos por parte de diferentes servicios de inteligencia internacional, sin excluir tampoco determinadas actitudes positivas de los servicios de inteligencia españoles, en lo que, sin duda, de poder consultarse la documentación oportuna en su día, modificaría radicalmente el ángulo de interpretación. Ahora bien, gracias al trabajo de, Antonio Muñoz Sánchez, *El amigo alemán* hoy sabemos, con seguridad, los importantes apoyos de la socialdemocracia alemana al PSOE. A partir de una múltiple documentación procedente de diferentes archivos alemanes –en buena parte inédita– examina como desde los años sesenta la Fundación Ebert ligada al SPD a través de su delegado Dieter Koniecki van a asesorar y aportar cuantiosos recursos al PSOE, que iban desde los económicos –con numerosos *liberados* a cargo del PSOE y de la UGT– pasando por la formación política. Un apoyo que se va a materializar con la apertura de una oficina de la propia Fundación Ebert en Madrid en 1976. Más allá de reforzar al *alternativa socialdemócrata*, tal y como explica Antonio Muñoz, se pretendería también –tras disipar las dudas iniciales entre la PSI-PSP de Tierno Galván y la nueva generación de dirigentes socialistas– consolidar una opción moderada y pragmática en torno al equipo de Felipe González. Véase, MUÑOZ SÁNCHEZ, Antonio, *El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia*, Barcelona, RBA, 2012, y en concreto los capítulos: “2. Tan lejos, tan cerca: el SPD y la renovación del PSOE (1970-1974); y “4. La Fundación Ebert y la reconstrucción del PSOE en España (noviembre de 1975-junio de 1977)”. Del mismo autor, *id.*, “La Fundación Ebert y el socialismo español de la dictadura a la democracia”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, n° 29, (2007), pp. 257-278; y *id.*, “Europeizar es democratizar: el SPD y la España del tardofranquismo”, *Historia del Presente*, n° 17, (2011), pp. 93-117. Asimismo ha de tenerse presente las reflexiones al respecto de Mariano Guindal cuando hablaba como el PSOE y la UGT serían elegidos como el *antídoto* frente a un posible ascenso del comunismo. «Las potencias occidentales, como Estados Unidos, Francia, Italia y sobre todo, Alemania, buscaban un antídoto contra el comunismo en el sur de Europa. PSOE y UGT fueron elegidos para neutralizar el PCE y CCOO». Y más adelante apunta: «Por eso optaron por favorecer por todos los medios económicos, políticos y diplomáticos a UGT y el PSOE, para neutralizar al PCE de Santiago Carrillo y a las CC.OO. de Marcelino Camacho». De hecho, se llegaría a situaciones límites en términos de intromisión internacional en asuntos de Estado. Tal y como narra el mismo periodista en plena elaboración de un proyecto sobre *ley sobre elecciones sindicales* –la conocida sobe Ley de Acción Sindical, sobre la que en siguientes capítulos se volverá– «con listas abiertas y sistema mayoritario» en el año 1978, se presentarían en el despacho del Ministro de Trabajo, Manuel Jiménez de Parga –a quien desde medios de la CEOE le llamaban *Copito de Nieve* y se le consideraba un *infiltrado comunista*– el embajador de Estados Unidos –Thomas Enders– y «un alto dirigente del PSOE y por otro de UGT» para advertirle de los riesgos de aprobar dicho proyecto ya que favorecería a los comunistas. A pesar de la dignidad mostrada en aquel entonces por Jiménez de Parga, de poco le serviría. No sólo sería removido al poco tiempo de su cargo sino que también el proyecto convenientemente retirado. GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, pp. 56 y 58, 122-123, respectivamente. Véase igualmente aquí, SANTOS, Félix y AROCA MOHEDANO, Manuela (dirs.), *Internacionalismo en la...*, *op.cit.*

⁶⁷ Los principales materiales de aquella conferencia serían recogidos en una publicación partidista: PSOE, *Conferencia de los Partidos Socialistas de Europa del Sur*, Madrid, PSOE, 1976. Al año siguiente, exactamente los días 7 y 8 de mayo de 1977, se celebraría la II Conferencia de los Partidos Socialistas del Sur de Europa –cuyos materiales pueden leerse en, PSOE, *Segunda Conferencia de los Partidos Socialistas del Sur de Europa*, Madrid, PSOE, 1977– y que tendría un formato similar a la anterior. Conferencia esta última que celebrada en Madrid, llegaba en un momento definitorio para el socialismo, a escasos meses de las primeras elecciones generales. En aquella cita del año setenta y siete asistirían ya un mayor número de invitados y de organizaciones. Junto con los ya citados participarían: Partido Laborista Británico, Partido Socialdemócrata Italiano, Partido Socialista Austriaco, Partido Radical Chileno, Alianza Socialista de Yugoslavia y la Unión de Partidos Socialistas de las Comunidades Europeas. Por lo demás, en aquella ocasión el PASOK participaría como invitado no como organizador. Asimismo haría acto de presencia Bernt Carisson, Secretario de la Internacional Socialista.

Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) así como con el Partido Socialista Griego (PASOK) y el Partido Socialista de Luxemburgo. Todo ello con la presencia de Hans Janichnek a la sazón Secretario de la Internacional Socialista.

Primero, allí se aprobaría una *resolución sobre España* por aclamación y que supondría un enorme respaldo internacional a la política de oposición del PSOE, en una coyuntura nacional *volátil*⁶⁸. En todo caso, lo más relevante sería la cerrada defensa por parte de Felipe González de la estrategia de *ruptura democrática*⁶⁹. Tras constatar en la sesión inaugural de la citada *conferencia* que “España sigue siendo la última dictadura de Europa”, planteaba como “[p]ara nosotros se trata de reconquistar la democracia más que de defenderla o de reforzarla” en comparación con sus *aliados* de Francia, Italia o Bélgica. Partiendo, al mismo tiempo, de la necesidad de superar el “reparto del mundo en bloques de influencia” se constataba como “España en este último cuarto de siglo va a tener una importancia para la evolución de Europa y particularmente para la evolución política de Europa del Sur”. Una Europa del Sur que junto con Portugal y Grecia estaba saliendo de duros regímenes dictatoriales, lo que imponía un marco de actuación específico⁷⁰. Con la consigna, por delante, de “quebrar las instituciones” el primer

⁶⁸ En la citada *Resolución* tras denunciar como el nuevo gobierno «autoritario continuador del franquismo» estaba empeñado en «mantenerse con cambios mínimos consistentes en modificar su fachada sin poner en peligro la estructura del régimen» y exaltar, a continuación, la «lucha popular» de la clase trabajadora, se planteaba el apoyo sin fisuras a dos objetivos prioritarios en relación a la política internacional del PSOE. Primero, se *declaraba*: «Que se opone y continuará oponiéndose al ingreso de España en la Comunidad Económica Europa [...] mientras que no se obtengan previamente la libertad de expresión y la libertad para las organizaciones políticas y sindicales, la libertad de los presos políticos y el libre retorno de los exiliados, y se realice un proceso constituyente para la consolidación de la democracia». Y segundo se *manifestaba*: «Su apoyo a la resuelta oposición del P.S.O.E. a la firma de un nuevo acuerdo entre España y los Estados Unidos para la utilización de bases militares, paso previo para el posterior ingreso de España en la OTAN». “Resolución sobre España aprobada por aclamación” en PSOE, *Conferencia de los...*, *op.cit.*, p. 28. Precisamente en la citada II Conferencia uno de los temas que mayor atención concitaría sería, precisamente, la ampliación de la CEE a países que habían salido o estaban saliendo de largas dictaduras. A saber los casos de Portugal, Grecia y España. De hecho, la ponencia presentada por el Partido Socialista de Portugal acapararía una enorme atención –PARTIDO SOCIALISTA DE PORTUGAL, “Perspectivas de integración de Portugal, Grecia y España en la C.E.E.” en PSOE, *Segunda Conferencia de...*, *op.cit.*– entre los delegados asistentes. Sin embargo, serían unas declaraciones realizadas por François Mitterrand en la sesión de clausura las que marcarían –pese a las dificultades de alcanzar un *consenso* por las diferencias existentes en torno a la política europea del sector agrícola– el rumbo a seguir: «el día en que presente (España) el problema de forma concreta, que no haya ambigüedades, los socialistas franceses no ven en la adhesión española más que ventajas políticas para el desarrollo de la democracia y del socialismo en Europa». Cita extraída de, MANGAS MARTÍN, Araceli, “La II Conferencia de los Partidos Socialistas del Sur de Europa”, *Revista de Instituciones Europeas*, vol. IV, nº 3, (1977), pp. 882-883.

⁶⁹ GONZÁLEZ, Felipe, “La construcción de una Europa socialista y democrática” en PSOE, *Conferencia de los...*, *op.cit.*. Las citas corresponden a las pp. 5-7, de forma respectiva. Igualmente intervendrían en la *sesión inaugural* François Mitterrand o Andreas Papandreu pesos pesados del socialismo europeo. Por lo demás, en lo referido a la posición del secretario general del PSOE sobre la *ruptura democrática* que, en breve, iba a transformarse en la *reforma pactada*, véase la entrevista concedida por Felipe González a *El País*, el 13 de junio de 1976 bajo el título: “Felipe González, al frente del partido de Largo Caballero”. Y se recordaba allí mismo en la entrada de la noticia como todavía el propio González seguía siendo un «delincuente político. Tiene todavía un proceso por asociación ilícita y propaganda ilegal». Todavía más. Aquel mismo día el mismo diario publicaba la siguiente noticia: “Varios miembros del PSOE, detenidos”, *El País*, 13 de junio de 1976. Consúltese aquí de nuevo el ejemplar estudio de, SABIO, Alberto, *Peligrosos demócratas...*, *op.cit.*.

⁷⁰ En relación con las transiciones democráticas del sur de Europa y el papel jugado por los partidos socialistas: GINER, Salvador, “Southern European Socialism in Transition”, *West European Politics*, vol. VII, nº 2, (1984), pp. 138-157; PRIDHAM, Geoffrey, “Southern European socialist and the state: consolidation of party rule or consolidation of democracy?” en GALLAGHER, Tom y WILLIAMS, Allan M. (eds.), *Southern European socialist...*, *op.cit.*, pp. 132-162. Por otro lado, véase: DURÁN,

objetivo del socialismo pasaba por concretar una política de alianzas con “todas las fuerzas que luchan por la Ruptura Democrática”. La conquista de la democracia giraría, por tanto, en transformar la correlación de fuerzas existentes, cuya posibilidad comenzaba a percibirse tanto en España como en el resto de los países del Sur de Europa. Todo ello revestido de un discurso marxista, de clase y radical:

«Las relaciones de poder entre las distintas clases sociales de nuestro país, claramente a favor de la derecha industrial y financiera, reforzado también por la ultraderecha, pueden modificarse en el curso de los acontecimientos que sucedan en España por la dinámica del cambio político de una dictadura a una democracia. Esta modificación del equilibrio de fuerzas entre las clases sociales hace esperar a los socialistas que el cambio democrático permita avanzar hacia la construcción de una sociedad socialista».

No obstante, el camino no se previa nada fácil. “No creemos previsible que la izquierda española, consiguiendo un 51 por ciento de los votos, pudiera gobernar con un frente populista o de unidad popular”. La razón: “la derecha goza de apoyos muy sólidos en el seno del ejército que, en definitiva, tiene una gran parcela de poder”. Condicionada por tanto “la estrategia de la izquierda y por consiguiente la actitud del PSOE”, se avisaba de que “[n]o aceptaremos ningún compromiso con el poder que comporte la exclusión de la vida política de cualquier de las fuerzas democráticas que luchan por la Ruptura”. Sin querer “caer en triunfalismos” por tanto la “alternativa democrática” pasaba de cualquier de las formas por la “defensa de la Ruptura Democrática, no sólo por razones de carácter táctico dentro del seno del partido socialista, sino también por razones ideológicas”⁷¹.

Ahora bien, más allá de la siempre tan traída *ruptura democrática*, el *socialismo democrático* a nivel europeo en la consecución de sus objetivos internacionales, tenía que “reconsiderar su estrategia frente a la clase dominante” así como en lo “que concierne a las relaciones entre las organizaciones políticas mismas, tanto a escala nacional como internacional”⁷². A ello estaba dedicada la ponencia presentada en la conferencia por parte del PSOE, “Coordinación de la acción entre las fuerzas de izquierda en Europa del Sur” y defendida por Alfonso Guerra⁷³. Una ponencia en donde ya se podía entrever algunos matices de cierta

Rafael, *Contención y transgresión. Las movilizaciones sociales y el Estado en las transiciones española y portuguesa*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.

⁷¹ Y continuaba: «La importancia para nosotros de una alternativa democrática, unidas todas las fuerzas democráticas, tiene una trascendencia de presente y de futuro que se refleja no sólo en el campo de los compromisos políticos sino, en algunos casos, en el campo de los compromisos sindicales, de los compromisos de unión de las fuerzas de la clase trabajadora para defender en común sus intereses como clase». GONZÁLEZ, Felipe, “La construcción de una Europa socialista y democrática” en PSOE, *Conferencia de los...*, *op.cit.*, p. 7. Véase aquí también, GONZÁLEZ, Felipe y GUIDONI, Pierre, *Entretiens sur le socialismo en Espagne*, Paris, Tema, 1976.

⁷² PSOE, “Coordinación de la acción entre las fuerzas de izquierda en Europa del Sur” en PSOE, *Conferencia de los...*, *op.cit.*. Las citas corresponden a las pp. 23-27, de forma respectiva. Por lo demás, y nuevamente, en lo que se refiere a la II Conferencia del año siguiente, la ponencia presentada por el PSOE aunque con título diferente –“Democracia y socialismo en el Sur de Europa” en PSOE, *Segunda Conferencia de...*, *op.cit.* – continuaba por los mismos derroteros. Se insistiría nuevamente en aquello de la *ruptura democrática*, en el rechazo de la idea del «compromiso histórico», es decir del «nuevo modelo capitalista de desarrollo» al que se confrontaba la «alternativa socialista» como «la alternativa democrática posible» para los países del Sur de Europa, sumado lo anterior a una frágil idea de unidad con la más amplia izquierda que no terminaba por concretarse. Acaso se profundizaba en lo teórico en la ampliación del *frente de clases*, ahora denominado como “bloque social” «movilizado activamente por el triunfo del proyecto socialista», y que tendría en el caso del PSOE su más tardía ubicación programática en el XXIX Congreso de 1979. Todo ello revestido de un calculado lenguaje que tratando de evitar el electoralismo aunque no descartándolo en el fondo y forma, se concretaba en cómo «[e]l interés por el socialismo no es sólo el interés de la clase obrera».

⁷³ Junto a la citada ponencia se presentarían otras tres: primero, “El lugar de la Europa del Sur en la política mundial”, por parte del Partido Socialista Italiano y presentada por Mario Zagari; segundo, “El

relevancia que, en breve, se incorporarían a las directrices partidistas del socialismo español. ¿Qué se decía allí? Primero, había que rechazar la “falta [de] alternativa: la elección entre la URSS y los Estados Unidos”. Pues precisamente las “tensiones nacidas de la guerra fría habían conseguido neutralizar en gran parte a las fuerzas del movimiento obrero y a sus organizaciones”. Todo ello con el resultado de una “pérdida de influencia del movimiento obrero tanto en el plano político como en el plano sindical”⁷⁴. Segundo, si bien el “desarrollo económico superior de los países de Europa del Norte en gran parte fundado sobre la explotación del tercer mundo ha permitido responder a un cierto número de reivindicaciones de clase obrera”, se constataba como aquel mismo modelo estaba en crisis por más que fuera el referente inmediato. Todavía más. Partiendo de la “mentalidad de depredación” del capitalismo en los países del Sur, aquella coyuntura fruto de las desigualdades socioeconómicas, había dado lugar a un movimiento obrero “muy combativo”. Y en consecuencia: “la desproporción evidente en la distribución de la renta, ha provocado una toma de conciencia política muy radicalizada”. Resultado de lo anterior: la “renovación y potencialidad de los partidos socialistas”.

Redefinir un modelo de actuación de un socialismo adaptado a los nuevos tiempos políticos se presentaba, por tanto, en una prioridad clave. Y ahí aparecían de nuevo varios referentes cercanos. La clave del éxito de determinados partidos socialistas –como los de Francia y Portugal– estaba en que “han renunciado a la política fácil –a corto plazo– de la colaboración de clases, a la gestión del capitalismo en crisis”. A lo que debía añadirse que “al comportamiento democrático de estos partidos que han defendido siempre la libertad, les ha permitido asumir las convicciones socialistas de amplios sectores de la clase obrera y de amplias capas populares”. Un ejemplo a tener en cuenta. De este modo, el proceso de *renovación socialista* contaba con unas condiciones objetivas y subjetivas para la “ruptura con el capitalismo que propone la izquierda”.

Por este mismo camino, se necesitaba la “coordinación de las fuerzas de izquierda”. Política de alianzas en la que no se descartaba la colaboración con los comunistas ni con las fuerzas progresistas y ni mucho menos con los sindicatos. Variaban los marcos nacionales no la estrategia a seguir en líneas generales. Especialmente llamativo resultaba –en boca del mismo Alfonso Guerra– la propuesta de alianza con los comunistas, a los que se reconocía su fortaleza política, social y sindical en países como Francia o Italia aunque no en España. Con la crítica por delante al “modelo soviético” se afirmaba por lo demás:

«Las campañas antisocialistas de algunos partidos comunistas y el anticomunismo de algunos socialistas no favorecen más que a la derecha en el poder. Socialistas y comunistas deben tomar conciencia de su tarea en común y actuar en consecuencia».

Sin embargo, la unidad de las fuerzas de izquierda no podía a realizarse a cualquier precio:

socialismo europeo frente a la crisis del capitalismo”, por parte del Partido Socialista Belga y defendida por Oscar Debunne; y tercero, “Defender y reforzar la democracia en Europa del Socialismo”, por parte del Partido Socialista Francés y presentada por Jean-Pierre Cot –todas ellas consultables en, PSOE, *Conferencia de los... op.cit.*–. Aunque desiguales en contenido y calidad, las tres ponencias establecían un conjunto de prioridades, objetivos políticos y criterios que serían ampliamente defendidos y en su caso llevados a cabo por buena parte de los socialistas europeos. Ya en 1977 otras cinco ponencias vinieron a complementar los paneles correspondientes: a las citadas ponencias del Partido Socialista de Portugal y del Partido Socialista Belga se sumaron las del Partido Socialista de Francia, “Cooperación entre Europa y el Tercer Mundo en una perspectiva socialista”; Partido Socialista de Belga, “La Cooperación, la paz y la seguridad de Europa después de Helsinki y antes de Belgrado”; Partido Socialista Italiano, “Los Partidos Socialistas del Sur de Europa y el Mediterráneo”; y, la ya citada del, PSOE, “Democracia y Socialismo en el Sur de Europa”. Todas ellas consultables en, PSOE, *Segunda Conferencia de... op.cit.*

⁷⁴ La incipiente crisis política y estratégica del movimiento obrero en la década de los setenta se constituyó en todo un nuevo fenómeno histórico, especialmente en el caso de Europa. Fenómeno que, con el paso del tiempo, se consolidaría y se ampliaría hasta límites insospechados. Véase, en este sentido, las tesis de, HOBBSAWM, Eric J., “¿Adiós al movimiento obrero clásico?” en *Política para una... op.cit.*, pp. 156-167.

«La exigencia de unidad no podría sin embargo ser reducida a una táctica electoral: en el momento actual si la mayoría absoluta de los sufragios es suficiente para dar acceso a las responsabilidades gubernamentales, es preciso para el ejercicio de poder contar con amplias capas sociales que apoyen el proyecto político de ruptura con el capitalismo que propone la izquierda y que las luchas sociales, en toda Europa del Sur, demuestran su actualidad».

La consecución de tal objetivo político tenía que realizarse a través de dos tareas previas: primero, ampliar el *frente de clases* para hacer hueco dentro de los programas socialistas a una “gran mayoría de las nuevas categorías engendradas por el desarrollo mismo de la sociedad industrial, víctimas también de esta explotación”. Y segundo la política de alianzas y de unidad debería estar asentada en “[r]enunciar a la competencia «irracional»” entre posibles aliados, al “intercambio de experiencias” o la “coordinación de las luchas sindicales a escala internacional”, entre otros nobles propósitos no menores.

Quedaba así meridianamente definido un marco de actuación de enormes potencialidades, tanto a nivel nacional como internacional, en donde el socialismo estaba llamado a jugar un papel clave. Como todo encuentro internacional si bien aquello tenía un sentido más ideológico en su sentido teórico que práctico, no deben desmerecerse los compromisos alcanzados. Más pronto o más tarde aquello iba a tener su traslación al mismo meollo del programa socialista en España y con ciertas variaciones en sus socios de Europa del Sur. Pero una cosa sería el programa del PSOE y otra muy distinta sus actuaciones tanto en relación a la unidad de la izquierda, la ruptura democrática, y, sobre todo, con respecto a su propuesta de superación del modelo capitalista.

En paralelo a los notables cambios políticos que se producían en el interior del régimen una vez fallecido el dictador e iniciado el reinado de Juan Carlos I⁷⁵, y que mostraban que algo se comenzaba *a mover*; la relativa tranquilidad en la que se movería el PSOE –en comparación con el resto de la oposición antifranquista– llevaría a que la cuestión de la *identidad del socialismo*, se convirtiera en sí misma en uno de los debates más importantes que hubo de afrontar durante su particular transición. Alejado de los conflictos obreros y de las movilizaciones pro-amnistía –dos de los motores de la conflictividad política– que marcarían la agenda política de la oposición en aquellos momentos⁷⁶, la aprobación de las Tesis Políticas del XXVII Congreso en diciembre de 1976 –celebrado desde el domingo 5 al miércoles 8–, que definía como objetivos estratégicos del PSOE la lucha por lograr el final de la dictadura –la

⁷⁵ Tres interesantes visiones de los cambios en el interior del régimen en, TUSELL, Javier y QUEIPO DE LLANO, Genoveva G., *Tiempo de incertidumbre: Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición (1971-1976)*, Barcelona, Crítica, 2003; SARTORIUS, Nicolás y SABIO, Alberto, *El final de la Dictadura. La conquista de la democracia en España (noviembre de 1975-junio de 1977)*, Madrid, Temas de Hoy, 2007; MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere, *La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977*, Barcelona, Crítica, 2008. Asimismo consúltese la monumental obra de VEGA, Pedro y JÁUREGUI, Fernando, *Crónica del antifranquismo: 1939-1975. Todos los que lucharon por devolver la democracia a España*, Barcelona, Crítica, 2007 [vol. I, 1983; vol. II, 1984].

⁷⁶ Sobre estos difíciles y complicados momentos repletos de acontecimientos véanse, entre otros posibles trabajos: AGUILAR, Paloma, *Políticas de la...*, *op.cit.*; GALLEGU, Ferran, *Los mitos de...*, *op.cit.*; CASTELLANOS LÓPEZ, José Antonio, “De consensos, rupturas y nuevas historias: una visión de la transición desde la España actual” en GONZÁLEZ MADRID, Damián A. (coord.), *El franquismo y...*, *op.cit.*, pp. 154-178; YSÀS, Pere, “La transición española en la democracia: historia y mitos” en ESPUNY TOMÁS, M^a Jesús y PAZ TORRES, Olga (coords.), *30 años de la Ley de Amnistía (1977-2007)*, Barcelona, Dykinson, 2009, pp. 19-40; GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Presentación. La «memoria democrática» como conflicto” en id. (coord.), *La memoria como...*, *op.cit.*. Por último, revítese el testimonio-semblanza de uno de los principales protagonistas de este tiempo desde el campo de la defensa de los derechos laborales: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Jaime Sartorius: en primera línea en la reconstrucción de la «lógica democrática»” en GÓMEZ ALÉN, José y VEGA, Rubén (coords.), *Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista*, Madrid, Ediciones GPS / Fundación de Abogados de Atocha, 2011, pp. 385-442.

ruptura democrática— iba acompañada de un proyecto para la transformación socialista de la sociedad capitalista española⁷⁷.

Bajo el lema, *Socialismo es Libertad* —y que su vez sería utilizado como eslogan electoral en las elecciones generales del siguiente año— en aquel Congreso se añadiría una novedad, por lo menos a nivel terminológico, de cierto calado: la dirección del PSOE defendería esta apuesta a través del denominado “socialismo autogestionario”, que aspiraba a plantear un proyecto que se diferenciara tanto de la propuesta socialdemócrata (*clásica*) como de la experiencia del socialismo real⁷⁸. Recuérdese, por lo demás, que la organización socialista celebraría en Madrid este su XXVII congreso en una situación de a-legalidad o cuando menos de cierta permisividad⁷⁹. Mientras tanto, el resto de la oposición antifranquista no sólo es que

⁷⁷ Véanse los apuntes al respecto de, GUERRA, Alfonso, *XXVII Congreso del PSOE*, Madrid, Avance, 1977.

⁷⁸ «3º.- Declaramos que la sociedad socialista que preconizamos, tendrá que ser autogestionaria. Las [n]acionalizaciones y la [p]lanificación no suponen necesariamente el socialismo. Queremos construir un modelo de sociedad que nos sea propio, en el que el socialismo y libertad sean conceptos coadyuvantes y no contradictorios; en el que todos los hombres sean dueños de su trabajo y su conciencia; en el que el poder de decisión y los beneficios sociales pertenezcan, solidariamente a la comunidad y no a minorías dominantes, cualquiera que sea su signo. Para evitar la degeneración burocrática se exige levantar una democracia socialista, democracia en los Partidos y los Sindicatos, en todos los órganos de poder y decisión que han de ser elegibles y revocables». AHFFLC, Fondo Saracibar, PSOE, “Dictamen Ponencia Política. XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1976”, Madrid, 7 de diciembre de 1976, sig. 002264-001, p. 1. El propio Santesmases lo formuló de la siguiente manera: «El proyecto socialista debe propiciar una serie de reformas estructurales que vayan sustrayendo a la burguesía parcelas de poder, traspasándolas a las masas trabajadoras, social y políticamente organizadas. El reformismo revolucionario no se conforma con ser un buen administrador de la sociedad burguesa: su objeto es destruir el capitalismo y sustituirlo por un sistema radicalmente diferente de organización económico-social por una civilización diferente». GARCÍA SANTESMASSES, Antonio, “Evolución ideológica del...”, *op.cit.*, p. 62. De hecho en la 7ª Tesis del Congreso extraordinario de 1979 se podía leer: «Los principios y valores del socialismo autogestionario mantienen al partido en una tensión permanente entre lo ya conquistado y los nuevos objetivos necesarios para concretar y actualizar ese ideal. El proyecto global se va realizando mediante la acumulación de las luchas y conquistas de cada etapa histórica. El ritmo del proceso y el alcance de las nuevas metas están condicionados, en cada momento, por el grado de apoyo que consigue el proyecto socialista en el seno de la sociedad». AHFFLC, PSOE, “59 Tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE”, Madrid, julio de 1979, sig. 185-21, p. 3.

⁷⁹ El hecho de celebrar el citado congreso en pleno centro de Madrid supuso todo un logro para el socialismo español, tal y como como se reconocía abiertamente en una *circular* del partido en diciembre de 1976, dirigida a todas las federaciones, agrupaciones y secciones: «El Partido se planteó la celebración del Congreso como un triple reto: habíamos que celebrarlo en Madrid contra la arbitrariedad del poder que ponía toda clase de obstáculos; debía responder a la creciente importancia del Partido en cuando se refiere a la organización del Congreso; y tenía el Partido que ser capaz de ofrecer un auténtico programa de actuación política, proyecto de ejercicio práctico del poder socialista. Sobre el triple reto el Partido ha sabido triunfar». AHFFLC, Fondo Saracibar, PSOE-CE, Secretaria de Organización, “Circular nº 3”, Madrid, diciembre 1976, sig. 002264-001, p. 1. La UGT compartiría tan ‘privilegiada’ situación en lo que no dejaba ser una política más que explícita de tolerancia con el socialismo. Por ejemplo, si el XXVII Congreso del PSOE se celebraría en diciembre de 1976, cinco meses antes durante los días del 15 al 18 de abril —tras la impresionante oleada huelguística de los meses anteriores— se llevaría a cabo el XXX de la UGT en el restaurante Biarritz también en pleno centro de Madrid. ¿Cómo fue posible? En primer término, véanse los documentos aportados por Pablo Castellano —*Yo sí me...*, *op.cit.*, pp. 438-439— al respecto. Por un lado, la carta fechada el 5 de abril de 1976 y encabezada por Nicolás Redondo al “Sr. Jefe Superior de Policía” para legalización del que habría de ser el XXX Congreso de la UGT; y por otro lado, la respuesta de parte de la Jefatura Superior de Policía cuatro días después derivando el asunto a otros organismos competentes. Finalmente sobre las causas de su celebración final, véase lo que explicó, a posteriori, uno de los protagonistas ya citados: «Nos pareció pertinente hacer el XXX Congreso en el interior —apunta Nicolás Redondo— a pesar de las dificultades que estábamos observando. A mí, alguno me llamó traidor, vendido a Martín Villa. Optamos por hacerlo aquí sin saber lo que iba a pasar en

permaneciera en la clandestinidad, sino que era salvajemente represaliada, detenida y enjuiciada por el TOP en uno de los periodos de mayor represión (todavía franquista, para más señas)⁸⁰.

Reforzada la organización, en vías de consolidación de un nuevo liderazgo cada vez más personalista y conformado un equipo de trabajo estable, la citada resolución política pronto se volvería como un “boomerang” contra la propia organización⁸¹. Con contenidos fuertemente radicales, declarándose un partido marxista que buscaba como último objetivo la transformación de la sociedad capitalista, el PSOE se convirtió de un *plumazo* en el partido más radical de la

realidad, porque unas veces nos decían sí, y al día siguiente nos decían que no. Recuerdo que recurrimos al ministro de asuntos exteriores y le pusimos de manifiesto lo negativo que sería la no celebración del Congreso cuando tenía el Gobierno necesidad de dar una imagen de apertura en Europa. El propio Fraga manifestó posteriormente que fue un lío ese congreso. No todo el Gobierno estaba de acuerdo [...]. A mí, además llegaron a amenazarme desde el ministerio de la gobernación con la decisión de prohibir el congreso». Nicolás Redondo en declaraciones a, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, *op.cit.*, pp. 97-98. Por su parte, Mariano Guindal ha apuntado lo siguiente de las presiones internas que recibiría el propio Redondo y del desconcierto en política sindical por el que atravesaba el PSOE: «Nicolás Redondo me contó que cuando propuso a su ejecutiva que el Congreso se celebrara en Madrid [...] la idea ‘cayó como un chorro de agua fría. Los del exterior no lo comprendían. Se me acusó de todo. Decían que estaba intentando cargarme la UGT. Por otra parte, algunos destacados miembros del PSOE defendía que lo lógico era fortalecer a CCOO, que como organización era más real. Confiaban más en ellos que en nosotros [...]. Fue un debate muy duro». GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, pp. 84-85. Por su parte, Martín Villa escribiría en sus más que singulares *memorias*: «La autorización la había solicitado el sindicato ante el Ministerio de la Gobernación, cuya primera determinación fue dictaminar que se trataba de un asunto sindical. En realidad era un asunto político de máxima envergadura. En primer lugar planteaba frontalmente los límites de la flexibilidad del gobierno frente a la reforma y sobre todo frente a sus consecuencias. Con los proyectos de ley de derecho de reunión y de asociación política circulando, no se podía decir no a los socialistas sin dar la impresión de que la apertura no era más que un revoco de la fachada. Para nosotros y para los socialistas era muy significativo que se planteara la cuestión no respecto a una reunión del PSOE, es decir, del partido político, sino de la UGT, del sindicato». MARTÍN VILLA, Rodolfo, *Al servicio del Estado*, Barcelona, Planeta, 1984. En cualquier caso, como ha afirmado Rubén Vega que un pequeños sindicato con no más de siete mil afiliados consiguiera celebrar finalmente dicho congreso, todo ello con una «una amplísima cobertura en los medios de información y más de cien periodistas presentes, y las apabullantes credenciales de homologación [...] representan un espaldarazo de primer orden para una organización que sigue siendo aún extraordinariamente débil». VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, *op.cit.*, pp. 1-2. Como recuerda el propio historiador, el mismo finalmente sería permitido «bajo la cobertura de unas ‘jornadas de estudios sindicales’». *Ibíd.*, p. 5.

⁸⁰ La maquinaria represora seguía bien engrasada: a los 4.317 procedimientos abiertos por el TOP en 1975 se agregarían los 4.795 abiertos al año siguiente por parte del órgano represor nacido en 1963 al calor del asesinato de Estado de Julián Grimau. Otro ejemplo de que la represión continuó y se acentuó nos los proporciona los datos disponibles sobre las detenciones, encarcelamientos y procesos abiertos en los meses previos a la celebración de las elecciones a Cortes Generales en junio de aquel mismo año: 2.747 detenidos entre enero y marzo de 1977, o sin ir más lejos los 232 detenidos entre el 1 al 15 de junio. Datos procedentes de, SARTORIUS, Nicolás y SABIO, Albero, *El final de...*, *op.cit.*, p. 23. Sobre el TOP véase, ÁGUILA, Juan José del, *El TOP: la represión de la libertad (1963-1977)*, Barcelona, Planeta, 2001. Véase aquí también *nota 181 y nota 258*.

⁸¹ La composición de la dirección de la Comisión Ejecutiva entrante sería: Presidente, Ramón Rubial; Primer Secretario, Felipe González, Secretario de Organización, Alfonso Guerra; Secretario de Relaciones Internacionales, Luis Yáñez-Barnuevo; Secretario de Relaciones Políticas, Enrique Múgica; Secretario de Formación y Documentación, Luis Gómez Llorente; Secretario de Propaganda, Guillermo Galeote; Secretario de Prensa, Javier Solana; Secretario Sindical, Eduardo López Albizu; Secretario de Relaciones con las Juventudes, José M^a Benegas; Secretaria Administrativa, Carmen García Bloise; Secretario de Emigración, Josep Luis Albiñana; Vocales, Nicolás Redondo, Carlos Cigarrán, José María Triginer, Luis Fajardo Spínola, Rafael Ballesteros, Antonio García Miralles y Miguel Boyer. Datos extraídos de, MARTÍN NAJERA, Aurelio, *Partido Socialista Obrero...*, *op.cit.*, p. 46.

socialdemocracia europea⁸². Todo ello ante la presencia y complacencia de los grandes líderes de la socialdemocracia europea como François Mitterrand, Willy Brant, Olof Palme o Bruno Pitterman presidente de la Internacional Socialista. La organización socialista en una muestra de lo que se denominaría como su discurso *radical posibilista* señalaba:

«El PSOE se define como socialista, porque su programa y su acción van encaminados a la superación del modo de producción capitalista mediante la toma del poder político y económico y la socialización de los medios de producción, distribución y cambio por la clase trabajadora. Entendemos el socialismo como un fin y como el proceso que conduce a dicho fin, y nuestro ideario nos lleva a rechazar cualquier camino de acomodación al capitalismo o a su simple reforma.

El PSOE reafirma su carácter de partido de clase y, por lo tanto, de masas, marxista y democrático. Somos un partido de clase en cuanto defendemos y luchamos por el proyecto histórico de la clase obrera: la desaparición de la explotación del hombre por el hombre y la construcción de una sociedad sin clases. Somos un partido marxista porque entendemos el método científico de conocimiento y transformación de la sociedad capitalista a través de la lucha de clases como motor de la historia»⁸³.

De este modo, el “PSOE de 1976 se definía, pues, desde su base a la cima como partido marxista y nadie parecía estar a disgusto con esa identidad aunque no todos tuvieran de acuerdo en lo que significaba o implicaba”, ha resumido oportunamente Santos Juliá. Ahora bien, prosigue el mismo profesor que, sin duda, aquella decisión fue, antes que nada, una opción estratégica más que una decisión propiamente ideológica: “[a] la salida del franquismo, nadie que no fuera marxista podía aspirar seriamente a erigirse en eje de la oposición”⁸⁴. Y aunque reducirlo todo a una mera cuestión de identidad puede terminar desviándonos de lo realmente importante, en verdad aquellas consignas radicalizadas no fueron más allá de discursos y del blanco y negro de los textos.

Aquí cabría añadir, como a las pertinentes consignas *internacionalistas* y *antiimperialistas*, no se descartaba que en la lucha por la conquista de la democracia, dentro de una concepción de la vanguardia cercana al leninismo, llegado el caso se tuvieran que tomar “medidas de fuerza”. Así se señalaba literalmente:

«El grado de presión a aplicar deberá estar en función de la resistencia que la burguesía presente a los derechos democráticos del pueblo, y no descartamos, lógicamente, las medidas de fuerza que sean necesarias para hacer respetar los derechos de la mayoría haciendo irreversibles mediante el control obrero, los logros de la lucha de los trabajadores»⁸⁵.

No terminaba ahí el asunto, pues tras remarcar que “para el PSOE, sea principio esencial de su doctrina la lucha por la conquista del poder político como palanca para la construcción del socialismo” se remarcaba que “la crisis actual del capitalismo monopolista”

⁸² Véase, en este sentido, AHFPI, PSOE, Secretaría de Formación, “El marxismo (I)”, Madrid, 1975, sig. Fa 195.

⁸³ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE, “Dictamen Ponencia Política. XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1976”, Madrid, 7 de diciembre de 1976, sig. 002264-001, p. 1. Otro ejemplo significativo de aquellos tiempos eran los calificativos que se empleaban para definir la posición sindical de la UGT: «de clase, libre, democrático, autónomo, unitario, representativo, autogestionario, internacionalista y revolucionario» (p. 5). El propio, Francisco Bustelo denominaría aquel discurso como el ejemplo del *pragmatismo-oportunismo*. BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, pp. 108-109.

⁸⁴ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, pp. 507-509. Y añadía a continuación: «Todos daban por descontado, sin embargo, que poseer una identidad no significaba emprender una práctica política radical [...] sino aprovechar las oportunidades de ocupar las parcelas de libertad abiertas por la crisis del régimen franquista para avanzar posiciones hacia la democracia». *Ibíd.*, p. 512.

⁸⁵ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE, “Dictamen Ponencia Política. XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1976”, Madrid, 7 de diciembre de 1976, sig. 002264-001, p. 2.

constituía la evidencia más palpable del “deterioro del aparato autocrático del Poder [franquista]”. Lo que conducía, previa exaltación del papel de la clase trabajadora, a que la *ruptura democrática* fuera, de hecho y de derecho, el “único proceso racional y pacífico que culminará con la devolución de la soberanía popular”. *Ruptura* por y a través de una “amplia movilización de masas”, que, a su vez, evidenciaba como la “alternativa reformista” simplemente era una “opción seudodemocratizadora, cuyo objetivo es salvaguardar los intereses de la clase dominante intentando recuperar a ciertos sectores de la burguesía que entonces se alineaban dentro de la oposición democrática”.

Tras toda la tabla reivindicativa para alcanzar la *libertad*, se apostaba por una doble vía para tal objetivo: primero a través de un “compromiso constitucional” en base a una política alianzas abierta con la oposición antifranquista; y segundo, a través de la “movilización responsable de masas” como elemento de presión. Y para concluir se remarcaba y se dejaba bien claro que el “PSOE, reafirma su vocación republicana”, aunque “aceptará la decisión del pueblo sobre la forma del Estado”⁸⁶. Con todos los matices esgrimidos –responsabilidad, aceptación de la forma de Estado...– el propio PSOE se situaba tan a la izquierda que pronto le tocaría rectificar en el mismo instante en que el juego político de la *transición a la democracia* comenzará a aclararse⁸⁷.

Los posicionamientos en aquellos momentos de la izquierda comunista y la izquierda radical así como la cambiante correlación de fuerzas pesaron en esta autodefinición, en gran medida, “gratuita” para tomar acomodo de lugar en un nuevo panorama político que con todas sus dificultades se asentaba lentamente. Así las tareas del PSOE para la profundización y redefinición de esta estrategia pasaron por,

«aumentar su militancia, atraer bajo su égida a todos los demás grupos y grupitos socialistas, aclarar sus dudas de siempre entre reforma y revolución, establecer una dirección y organización internas democráticas y fiables»⁸⁸.

El congreso de 1976 sería el principio del fin de una etapa del socialismo que duró lo que duró. En breve, las señas de identidad y los principios ideológicos jugarían un papel secundario⁸⁹. Tras este calificado “error juvenil” de la nueva dirigencia, la cultura política del socialismo iría adquiriendo nuevos contornos.

⁸⁶ Todas y cada una de las citas en, AHFFLC, Fondo Saracibar, PSOE, “Dictamen Ponencia Política. XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1976”, Madrid, 7 de diciembre de 1976, sig. 002264-001, pp. 3 y 4. Igualmente el PSOE de cara al referéndum para la reforma política a celebrarse del 15 de diciembre de 1976 mantenía, en sintonía con el resto de las fuerzas opositoras, su oposición llamando a la abstención.

⁸⁷ Véase la traslación de estas propuestas políticas al programa económico de cuya importancia se hablará largo y tendido: AHFPI, PSOE, “Programa de transición: económico [resoluciones del] XXVII Congreso del PSOE”, Madrid, 1976, sig. Fa 1286. Ahora bien, en aquellos tiempos de *radicalismos políticos* –al menos en su faceta *discursiva*– el documento final aprobado tendría una no desdeñable consecuencia: «El vuelco radical que sufrió el documento económico aprobado en el primer congreso legal del PSOE, en 1976, le llevó [a Miguel Boyer] a romper con ellos y a afiliarse al Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez». Según narraron en su día Mercedes Cabrera y Fernando del Rey Reguillo, quienes añadieron: «Sin embargo, se mantuvo siempre cerca de Felipe González, a quien asesoró en materia económica, mientras era vetado por Alfonso Guerra». CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de..., op.cit.*, p. 352. Compléméntese lo anterior con lo apuntado en el Capítulo 5, *nota 33*.

⁸⁸ BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta..., op.cit.*, p. 128.

⁸⁹ La representación de esta ‘nueva cultura del socialismo’ ha girado básicamente en torno a la figura de Felipe González para quien la ideología, tal como lo describiera Richard Gillespie «era para él una preocupación retórica. Es posible que la militancia católica juvenil de González dejara una huella permanente, no tanto religiosa como reflejaba en un enfoque elitista de la política, imbuido de un cierto paternalismo, y una falta de interés por el pluralismo en el seno de su propio partido». GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido..., op.cit.*, p. 381.

En este trance se mostrarían las primeras “contradicciones del socialismo” en su interior⁹⁰. Las diferencias en las políticas de alianzas y en las formas de combatir al franquismo entre la dirección y las bases de la organización fueron agrandándose. Por un lado, los dirigentes comenzaban a participar en el lento pero progresivo proceso de reforma elitista, llegando a diferentes acuerdos con los antiguos representantes del franquismo; por otro lado, las bases llevaban diferentes acciones –la llamada política de *acción de masas*– contra la dictadura y los gobiernos de la monarquía, intentando generar las mayores contradicciones de un estado agonizante en línea con la *ruptura democrática*⁹¹. Propuesta también de breve existencia, pues con la llegada del gobierno de Adolfo Suárez se daría paso a la *reforma pactada*, una vez constatado el débil pero real equilibrio de correlación de fuerzas, que impedía que una de las dos partes enfrentadas pudiera imponerse sobre la otra. Por lo demás, los nuevos dirigentes socialistas pronto se autoproclamaron los máximos protagonistas de las plataformas unitarias de lucha contra el franquismo⁹².

Superados estos impases, la agenda política estaría marcada por un nuevo desafío: llegar en la mejor de las condiciones posibles a las primeras elecciones democráticas. La *lógica del electoralismo* se iría imponiéndose a ritmos a agigantados hasta convertirse en un *principio de realidad*⁹³.

⁹⁰ Véase aquí de nuevo, GÁLVEZ BIESCA, Sergio y MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “Las contradicciones del socialismo: una aproximación a la historia política del PSOE en la Transición (1972-1986)” en *La transición a...*, *op.cit.*.

⁹¹ La transición postfranquista estaría caracterizado por la moderación a través de una política de *pactos de Estado*, en la que los partidos de la izquierda y sindicatos mayoritarios participarían. Como finalmente señalaron sin el menor rasgo de autocrítica, tanto los dirigentes socialistas como la organización en su conjunto, «tampoco se alcanzó en rigor la ruptura, ya que en la nueva situación democrática hemos heredado sin transformación de los aparatos del Estado franquista y la situación económica anterior; e incluso se han legitimado de cara a esta nueva etapa personalidades y fuerzas vinculadas al antiguo régimen». AHFPI, PSOE, Secretaria Federal de Formación, “Carpeta del militante. Resumen de la Resolución Política del Congreso Extraordinario”, Madrid, 1979, sig. Fa 186 p. 3. No obstante, meses previos al Congreso extraordinario, y ante un público tan selecto como el del *Club Siglo XXI*, se mantenía una postura mucho más ambigua por parte del mismo Felipe González. Decía allí primero: «[p]or consiguiente, se ha producido una síntesis entre reforma y ruptura. Porque ha habido un cierto talante de reforma en el procedimiento y, desde luego, una ruptura indiscutible en el contenido». Para a continuación señalar: «[e]n realidad, en este país, lo que se ha producido es la ruptura democrática y pacífica con el pasado». PSOE, “Conferencia pronunciada por Felipe González Márquez en el Club Siglo XXI el 12 de febrero de 1979”, Madrid, PSOE, Secretaria de Organización Federal, 1979, p. 5. Una visión interna y crítica de aquel proceso en, CASTELLANO, Pablo, “El abandono de la ruptura” en *id. Sobre el Partido...*, *op.cit.*, pp. 135-145.

⁹² «La constitución de ‘Coordinación Democrática’ significa la culminación de una etapa –y por tanto el comienzo de una nueva– que se ha caracterizado por el protagonismo del PSOE, que ha ido marcando la iniciativa en todas las fases de la negociación Plataforma-Junta y en general en la política de la oposición, desde el Congreso de Suresnes». AHFPI, AE, PSOE, “Circular n° 29. A todas las federaciones y secciones. A los miembros del CN”, Madrid, 9 de abril de 1976, sig. AE-721-33, pp. s/p. Véase aquí también, MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “La alternativa democrática del PSOE: historia de la participación política del PSOE dentro de las plataformas de oposición antifranquista (1970-1977)” en *Actes del Congrès...*, *op.cit.*.

⁹³ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, p. 314. El mismo autor defiende como un factor clave en la moderación del PSOE, la cuestión electoral y la necesidad de conseguir un partido electoralmente atractivo: «Desde luego, la adopción de una política electoralista fue un cuarto motivo para que se rebaja el radicalismo. Los líderes del PSOE se sintieron tentados de buscar una mayoría inmediata entre el nuevo electorado postfranquista, que era cauteloso y en su mayor parte no socialista, en lugar de seguir la vía más larga hacia el poder basada en la difusión del mensaje socialista. Aunque existía un apoyo electoral considerable a la izquierda, las especiales circunstancias de la transición española hicieron que los líderes del PSOE temieran buscar una mera pluralidad de votos, y su búsqueda no sólo de

Lo cierto es que, en paralelo, a todos estos acontecimientos, la nueva dirección socialista había venido mostrando interés en la cuestión electoral desde hacía años. De hecho, transferiría un considerable esfuerzo humano y económico en esta dirección a pesar de su situación de debilidad política y financiera. En 1974 la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE encargaría al equipo compuesto por Alfonso Guerra, José Félix Tezanos, Roberto Dorado y Julio Feo la creación del “Instituto de Técnicas Electorales” (ITE), con el objetivo de elaborar estudios, encuestas y análisis electorales que permitieran llegado el momento una rápida y eficaz adaptación al nuevo marco electoral⁹⁴. Bajo el “espejo” de una sociedad mercantil instalada en la calle Guzmán el Bueno en Madrid, desde allí se elaborarían todo tipo de actividades en relación a esta cuestión en donde, poco a poco, se conformaría la inicial maquinaria electoral socialista⁹⁵. Para ello contaría, primero, con la colaboración de importantes expertos en técnicas electorales, y segundo, con el apoyo técnico de otros partidos socialistas europeos. Lo que significó en palabras de Paul Heywood “profesionalizar” las campañas electorales del PSOE incluso antes de la muerte de Franco⁹⁶.

La fulgurante recuperación del partido socialista no puede entenderse sin tener en cuenta la actitud “tolerante” y “aperturista” mostrada por la dictadura en sus estertores y los primeros gobiernos de la monarquía, tal y como hemos visto en relación a la celebración de su 27º Congreso en Madrid, aunque otros tantos ejemplos se podrían citar⁹⁷. Además el PSOE se evitaría el desgaste político y organizativo de ser uno de los protagonistas del ciclo de luchas. *Legalizado de facto* antes de ser legal por el régimen, tampoco mostraría mayores preocupaciones con la legalización del PCE u otras organizaciones políticas, en tanto serían cuestiones a resolver en un futuro cercano⁹⁸. En este contexto de relativa tranquilidad, el socialismo podría encargarse de sus propios asuntos de forma más detenida que el resto de la izquierda política y sindical del país.

un apoyo masivo, sino socialmente amplio, a un gobierno socialista tendió a impulsar el partido a convertirse en un partido ‘atrápalo-todo’. Ello era totalmente compatible con la tesis del ‘bloque de clases’ derivada de los tiempos en que los sevillanos eran más radicales». Ibídem, p. 381. Una tesis que puede verse verificada también si nos apoyamos, nuevamente, en las tesis mantenidas por Antonio Muñoz Sánchez para quien el apoyo de la socialdemocracia alemana al PSOE pero de forma concreta a Felipe González, tendría como uno de sus objetivos centrales la *moderación* del socialismo español. MUÑOZ SÁNCHEZ, Antonio, *El amigo alemán...*, *op.cit.* y en concreto, véase el capítulo “5. Por la reforma negociada. El PSOE en la política alemana hacia la transición española (noviembre de 1975-junio de 1977)”, pp. 279-ss.

⁹⁴ En 1976 pasaría a llamarse el Instituto de Técnicas Electorales-Proyectos Sociales y Organizaciones Empresariales (ITE-PSOE). El propio Alfonso Guerra ha recordado lo novedoso y oportuno de aquella decisión: «Cuando yo dije en la dirección del partido en el año setenta y dos que quería preparar las próximas elecciones me querían matar: ‘¿Qué elecciones?’ Me decían porque Franco estaba todavía sanísimo [...]. En el setenta y cuatro, se empezó a ver que todo aquello se terminaba y ya nos dedicamos a viajar por Europa visitando los centros electorales de los partidos socialistas [...]. Ya de vuelta en España, nos hicimos un manual electoral, y no lo inventamos con toda la frescura del mundo porque nunca habíamos hecho nada electoral. Y luego todos no han ido copiando». Declaraciones de Alfonso Guerra a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, pp. 130-131. Al respecto véase también el trabajo de, DÍAZ-DELGADO LEZA, Javier, “Morir de éxito. Las técnicas y estrategias electorales del PSOE como factor explicativo de su triunfo en las urnas. La campaña electoral de 1982 como culminación de un éxito” en *Historia de la Época Socialista. Congreso Internacional. España: 1982-1996* [comunicación].

⁹⁵ Véanse los recuerdos de uno de los fundadores del ITE: TEZANOS, José Félix, “El PSOE entra en democracia” en id. (coord.), *PSOE 125...*, *op.cit.*, p. 130.

⁹⁶ HEYWOOD, Paul, “Mirror-images...”, *op.cit.*, p. 202.

⁹⁷ Véase lo apuntado en la *nota* 78. Junto con lo allí citado ilustrativas también resultan las memorias del ex-dirigente socialista, SAAVEDRA, Antón, *Secuestro del socialismo...*, *op.cit.*

⁹⁸ Sobre esta cuestión remitimos a los textos contenidos en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *30º Aniversario de la Legalización del PCE*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007.

Los resultados obtenidos en las elecciones de 1977, que sorprendieron a los propios dirigentes socialistas, consolidarían esta posición preeminente colocándoles como la segunda fuerza política⁹⁹. A fin de cuentas el “el PSOE [obtuvo] más votos y mayor número de diputados que nunca en toda su historia”¹⁰⁰, tal y como señalaría el propio Tezanos. La posterior firma de los Pactos de la Moncloa, y la aprobación de la Constitución, afianzaron al PSOE como el gran partido de la oposición. Ello con una consecuencia no menor: la lucha por la hegemonía político-electoral por la *izquierda* se había resuelto a la primera ocasión.

Aunque tendrían que pasar dos Congresos y una fuerte crisis política y organizativa de por medio, el objetivo del PSOE comenzó a perfilarse: *la conquista del poder político*. Lo que no evitaría nuevas “contradicciones” en el interior del socialismo a consecuencia esta vez de los propios éxitos electorales del partido, que no podían ocultar las contradicciones identitarias y organizativas existentes. La estrategia socialista “radical” y “posibilista” resultaría ser un importante corsé en la nueva coyuntura política en la que tenían que tomarse las decisiones centrales. En el siguiente cambio de rumbo, el PSOE adquiriría progresivamente “un nuevo lenguaje político”, en el que el socialismo pasaba de ser el agente principal de la revolución a convertirse en el garante de la consolidación de la democracia¹⁰¹.

4.2.2. Hacia la conquista del poder político: la «misión histórica» del socialismo (1977-1982)

Si en tan sólo un lustro, el que va de 1972 a 1977, la nueva generación dirigente socialista había sido capaz de reconstruir la organización socialista en sus bases fundamentales, logrando presentarse con unas credenciales inmejorables al conjunto de la sociedad española; en los siguientes cinco años consolidaría esta posición preeminente, al mismo tiempo, que su *alternativa* de gobierno tomaría forma. El PSOE y su dirigencia pusieron mucho de su parte al coste y precio ideológico que fuera. Pero también se aliaron en esta estrategia una serie de causas y factores que facilitaron un trayecto en cualquier caso complicado y no exento de problemas.

Llámesese el giro socialdemócrata, la sustitución de la ideología socialista por la de la modernización, la conversión del PSOE se produciría en estos mismos años de forma escalonada pero con el objetivo concreto ya destacado. Junto a las cuestiones políticas, resulta de especial relevancia el cambio de posiciones en lo que respecta a su programa económico. Asunto este de especial importancia como se examinará detenidamente en los siguientes epígrafes.

4.2.2.1. Construcción de un socialismo para la conquista del poder político (1977-1979)

La sucesión de acontecimientos y hechos históricos que transcurren, apresuradamente, desde 1976 hasta la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, confirmaron para el PSOE que la llegada al poder era una cuestión de tiempo¹⁰². Lo más difícil, ya estaba hecho: la entrada, y de qué forma, en las instituciones públicas.

⁹⁹ Como ha señalado Mónica Méndez estos resultados fueron en extremo sorprendentes ya que el PSOE «en la práctica, era un partido nuevo, que en pocos años tuvo que construir una organización y simultáneamente participar en las elecciones y acontecimientos que tenían lugar en el proceso de transición a la democracia». MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa...*, *op.cit.*, p. 332.

¹⁰⁰ TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, p. 51.

¹⁰¹ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 547.

¹⁰² La firma de la Constitución fue entendida y a su vez explicada como un triunfo propio que establecía el paso necesario para avanzar hacia el socialismo: «La Constitución de 1978, no obstante, supone una ruptura con la legalidad del período anterior y devuelve al pueblo su plena soberanía, permite la estabilización de la democracia y supone un paso importante en el cambio democrático hacia el socialismo». AHFPI, PSOE, Secretaría Federal de Formación, “Carpeta del militante. Resumen de la

Lo destacó en su día el profesor Santos Juliá: el primer cambio observable de la nueva estrategia socialista, y con él de su cultura política, sería la modificación de su *lenguaje político*. Un *lenguaje* que se convertiría en la expresión misma de la transformación programática del socialismo. En poco tiempo, se pasaría de un lenguaje *radical y posibilista* imbuido de una retórica marxista, a un discurso político en donde palabras como *ruptura*, *socialismo autogestionario*, y otras tantas, desaparecerían de inmediato. Estas modificaciones que no deben subestimarse en caso alguno, se debieron a la elaboración y puesta en marcha de unas nuevas formas de actuación en la sociedad en donde el frente institucional ganaría peso.

Prueba palpable de lo anterior sería la preparación y redacción final del programa electoral de 1977 del PSOE. Bajo el muy medido eslogan electoral “Socialismo es libertad” – combinado en menor medida con él de “La libertad está en tus manos”– el principal referente del socialismo español se presentaba a las primeras elecciones democráticas tras las últimas celebradas el 16 de febrero de 1936, con clara ventaja sobre sus principales competidores por la izquierda. Circunstancias todas ellas, que más allá de programas y manifiestos electorales, han de tenerse presente a la hora de evaluar resultados y estrategias.

Veamos algunas. Junto a la aprobación de una normativa electoral pre-constitucional¹⁰³ y los *discursos del miedo*; los avalistas y mecenas financieros contribuyeron con inusitado entusiasmo a promocionar a unos candidatos que aseguraran que todo cambiaría para que todo siguiera igual; mientras que, por otro lado, las condiciones en las que se presentó ya no sólo el PCE, legalizado a dos meses de las elecciones, sino buena parte de la izquierda antifranquista (y también *anticapitalista*) que así lo quiso, redujeron las posibilidades de transformar la acumulación de fuerzas aglutinadas tiempo atrás en votos para influir en el futuro cercano en las políticas del *cambio*. Todo lo cual configuraría un marco de actuación política que, sometido a los miedos, presiones y amenazas para nada veladas de los *poderes fácticos* –verdaderos protagonistas de los alcances del proceso de cambio político– condicionaría el desarrollo previo de las elecciones.

Tampoco es baladí recordar que estas primeras elecciones, tras el aplastante “Sí” del referéndum del 15 de diciembre de 1976 sobre la Ley de Reforma Política, estuvieron marcadas

Resolución Política del Congreso Extraordinario”, Madrid, 1979, sig. Fa 186, p. 3. Las negociaciones en torno a la Constitución no constituyó tema de debate generalizado dentro del PSOE –como otros tantos– llevándolas a cabo unos pocos dirigentes, entre ellos Alfonso Guerra, y en el que de nuevo se impusieron *los brazos de madera* en el grupo parlamentario. Entre los diferentes retratos de aquel proceso, muy clarificador y sintético ha sido el ofrecido por, POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, pp. 222-232. Sobre esta cuestión también, DEJUÁN, Oscar, “La constitución económica española de 1978 y el PSOE”, *Sistema*, nº 53, (1983), pp. 95-106. Por lo demás, sobre el papel central que jugaría Fernando Abril Martorell en estrecha comunión con el propio Alfonso Guerra, véase, primero, LAMELAS GIL, Antonio, *La transición en Abril: biografía política de Fernando Abril Martorell*, Barcelona, Ariel, 2004; la entrevista de Nativel Preciado al que fuera Vicepresidente Tercero del Gobierno de España en, JULIÁ, Santos, PRADERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la...*, *op.cit.*, pp. 206-210; y, el relato ofrecido por, HERNÁNDEZ ANDREU, Juan, *Economía política de la Transición en España*, Madrid, Editorial, Complutense, 2004, pp. 42-ss.

¹⁰³ Sobre el sistema de D'Hondt, la circunscripción electoral y la normativa electoral aprobada – Real Decreto-Ley 20/1977, de 20 de marzo, sobre *Normas Electorales* [B.O.E. 23 de marzo de 1977]– para la ocasión –y posteriormente refrendada, entre otros, en los artículos 68 y 69 de la Constitución y ratificada en su contenido básico por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, *del Régimen Electoral General* [B.O.E. 20 de junio de 1985] – consúltense diferentes opiniones en, LÓPEZ PINA, Antonio, “Sobre la ley electoral”, *Sistema*, nº 16, (1977), pp. 95-112; BILBAO ARRESE, Jesús Mario, “Ley Electoral y sistema de partidos en España”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 85, (1994), pp. 313-322; GÜNTHER, Richard, “Leyes electorales, sistema de partidos y élites”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 47, (1989), pp. 73-106; RAE, Douglas y RAMÍREZ, Victoriano, *El sistema electoral español: quince años de experiencia*, Madrid, McGraw-Hill, 1993; MONZÓN, Cándido, *Encuestas y elecciones*, Madrid, Tecnos, 2005; RUIZ RUFINO, Rubén, *La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los Diputados*, Madrid, Fundación Alternativas, 2006; y, BARAS, Montserrat y BOTELLA, Joan, *El sistema electoral*, Madrid, Tecnos, 2009 [1996].

por el *interrogante* sobre si finalmente las Cortes resultante serían o no “constituyentes”. Igualmente no es tampoco inocente traer a colación como a la altura de 1977 todavía quedaban “presos políticos” en las cárceles franquistas, así como la permanente impunidad con la que actuaban las “fuerzas de orden público”. Sumado a la también impunidad y prepotencia de las instituciones judiciales-represores franquistas¹⁰⁴. En suma, se estaba un escenario hartamente complicado en el que, sin embargo, y como se decía, la posición de partida fue ampliamente desigual para los partidos de la “izquierda”¹⁰⁵.

Presentadas estas circunstancias históricas, el programa electoral socialista para el 15 de junio de 1977, estuvo caracterizado por su moderación y su calculado lenguaje políticamente correcto¹⁰⁶. Todo ello con una seña característica: el alegato de la “memoria histórica” del PSOE para atraer un voto sociológico e histórico socialista y presentar, a su vez, una imagen de ruptura con el pasado más reciente, el franquista, y enlazar a su vez sus siglas con la II República¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Por ejemplo, se sigue desconociendo con exactitud el total de ‘presos políticos’ que quedaban en las cárceles franquistas por aquel tiempo tras las sucesivas medidas de gracia y indultos dictados desde 1975 –entre otros, Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, *por el que se concede indulto general con motivo de la proclamación de Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón, como rey de España* [B.O.E. 26 de noviembre de 1975]; Real Decreto Ley 10/1976, de 30 de julio, *sobre amnistía* [B.O.E. 4 de agosto de 1976]; Real Decreto de 388/1977, de 14 de marzo, *sobre indulto general* [B.O.E. 17 de marzo de 1977]; o, el B.O.E. Real Decreto-Ley 19/1977, de 15 de marzo, *sobre medidas de gracia* [B.O.E. 17 de marzo de 1977]–. Ahora bien, se calcula en, al menos, entre 1.500 a 1.800 los presos políticos –sobre cifras véanse: SUÁREZ, Ángel y COLECTIVO 36, *Libro blanco sobre las cárceles franquistas, 1939-1976*, París, Ruedo Ibérico, 1976, p. 300; SOBREMONTÉ, José Enrique, *Indultos y amnistía*, Valencia, Universidad de Valencia, 1980, pp. 101-102; RISQUES, Manel, “El segrest del passat: repressió franquista i oblit” en MARTÍNEZ CASTELLS, Àngels, DIGÓN, Raül y JUBERÍAS, Luis (eds.), *Ciutadania i participació política*, Barcelona, Fundació Pere Ardiaca, 2005, p. 119; AMNISTÍA INTERNACIONAL, *30 años de Amnistía Internacional en España*, Madrid, Amnistía Internacional, 2008; AGUILAR, Paloma *Políticas de la..., op.cit.*, pp. 284-304–. De hecho, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, *de Amnistía* [B.O.E. 17 de octubre de 1977] aún quedarían cerca de medio centenar de “presos políticos” a finales de aquel mismo año –véase, *El País*, “Hay medio centenar de presos políticos, según sus defensores”, 28 de diciembre de 1977–. *Presos políticos* que tan sólo saldrían a la calle pasados los meses. E incluso en casos no tan aislados como cabría pensar algunos de ellos tan sólo ‘conquistarían’ la libertad ya avanzada la década de los ochenta. Quizás el más significativo sea el de Jordi Solé Sugranyes, militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) en prisión por *delitos* cometidos antes de 1973, quien sería excarcelado finalmente en 1984.

¹⁰⁵ Sobre el contexto histórico de 1977 en relación a las primeras elecciones democráticas y la posterior aprobación de la Ley de Amnistía véase: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Jaime Sartorius: en primera línea en la reconstrucción de la «lógica democrática»” en GÓMEZ ALÉN, José y VEGA, Rubén (coords.), *Materiales para el..., op.cit.*. Por lo demás, y sobre la siempre traída ley de *punto final* que significó la Ley de Amnistía y su ‘ejemplaridad’ nos remitimos al más que explicativo documento del COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, “Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto: España. Adición. Comentarios del Gobierno de España sobre las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos”, Documento de las Naciones Unidas, CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1, 13 de enero de 2009 [original en poder del autor].

¹⁰⁶ Véase aquí primero: PSOE, *Manifiesto electoral del PSOE*, Madrid, 1977. Segundo, y en relación a la ‘inauguración’ del nuevo periodo democrático como en lo relacionado con el posterior proceso formativo de la militancia socialista: PSOE-CE, *Normas para interventores de mesas electorales*, PSOE, 1977. Tercero, las referencias sobre el programa electoral están extraídas de: PSOE, *Programa electoral del PSOE. Elecciones 1977*, PSOE, 1977. Igualmente no deje de consultarse la amplia *guía electoral* que realizaría, CAMBIO 16, *Un hombre, un voto guía electoral de 1977*, Madrid, Cambio 16, 1977.

¹⁰⁷ «El PSOE está profundamente arraigado en la entraña popular no sólo por su pasado honroso, sino por sus raíces populares a través de las Casas del Pueblo y por la presencia de los socialistas en los sindicatos ugetistas, que constituyen las fuentes que inspiran nuestra actuación»; «Las personas de edad recuerdan todavía cómo la presencia de los hombres del PSOE en cualquier órgano municipal o estatal fue garantía de rectitud y lealtad a unos principios de honestidad e integridad»; o, «Todas las personas

Matizado cada punto o propuesta electoral con absoluta precisión –a diferencia de las “incendiarias” tesis políticas de sus congresos– poco o nada hacía intuir que aquel programa era el de un partido marxista, radical, de clase... Antes el contrario, la mayor parte de su *programa electoral* era un inventario, más o menos exhaustivo, sobre los pasos necesarios para la conquista de la democracia. Un texto más propio de la socialdemocracia moderada o de la derecha política de convicciones democráticas. Bajo la consigna de la “Democracia, lo primero” no faltaban alusiones a la necesidad de “resolver pacíficamente los antagonismos entre grupos ideológicos y sociales”¹⁰⁸. Tampoco faltaban referencias a la necesidad de “preservar la paz civil”. Y si quizás un elemento se resaltaba era el de que “las Cortes elegidas el 15 de junio sean constituyentes”¹⁰⁹. De hecho, tras reafirmar la “unidad del Estado Español” y defender el “derecho a la autonomía de los pueblos de España” tampoco quedaba rastro del antes defendido *derecho de autodeterminación*.

Por otra parte, se hacía un especial hincapié en dos elementos presentes en aquellos momentos. Primero, “[t]erminar con el miedo es imprescindible para elegir con libertad”¹¹⁰; y segundo, y concretamente, la de presentar a los socialistas como “hombres nuevos, desligados de la etapa anterior”¹¹¹. Pues como se recordaba, “[h]oy todo el mundo se llama «demócrata», incluso «socialista»”¹¹².

Tampoco en la segunda parte del programa, la más extensa titulada “Cambiar la vida”, se podía localizar rastro de radicalismo en aspectos tan básicos como la economía o las relaciones laborales. Quizás lo más “radical” que había allí era la crítica a un “capitalismo [español] de carácter muy primitivo”, a lo que se añadía el *comentario* “de [cómo] la gestión económica de los gobiernos del régimen, que puede denominarse, sin paliativos, de desastrosa”¹¹³. Sin mención alguna a otro sistema político y socio-económico alternativo y/o rupturista, la denominada “alternativa socialista” se situaba, en lo sustancial, en la defensa de una “respuesta de carácter moral, devolviendo a nuestro pueblo la confianza en los hombres públicos”; y en segundo término, “consiguiendo en las próximas Cortes que se apruebe la legislación necesaria para superar los graves problemas de orden socioeconómico que nos afectan”¹¹⁴. A partir de ahí la consiguiente tabla reivindicativa, insistimos, más propia de la tradición socialdemócrata que de un partido que se reclamaba asimismo “socialista”. Ni rastro de nacionalizaciones ni de propuestas alternativas al modelo de relaciones capital-trabajo típicamente franquista. Incluso en un aspecto tan básico como una hipotética *reforma fiscal* las propuestas iban más en línea de terminar con el fraude generalizado, que antes plantear un modelo de corrección de desigualdades realmente existentes¹¹⁵. Eso sí, cierta retórica

que vivieron aquella época recuerdan a los socialistas como ejemplo de honradez en el desempeño de los cargos que ocuparon [...]. Jamás un socialista pudo ser acusado de ejercer su cargo con deshonestidad. Esta es una de las mejores tradiciones que el PSOE ofrece al pueblo». PSOE, *Programa electoral del...*, *op.cit.*, pp. 2 y 10, respectivamente.

¹⁰⁸ *Ibídem*, p. 4.

¹⁰⁹ *Ibídem*. Véase en este sentido, TEZANOS, José Félix, “Ante la necesaria apertura de un proceso constituyente en la España actual”, *Sistema*, nº 17-18, (1977), pp. 3-10.

¹¹⁰ PSOE, *Programa electoral del...*, *op.cit.*, p. 8. Y se añadía: «Es necesario que superemos los fantasmas del pasado y que todos los ciudadanos abiertamente, sepamos elegir, entre aquellas opciones que nos ofrecen, las que garanticen de una manera más nítida el funcionamiento de una sociedad democrática». *Ibídem*, pp. 8-9.

¹¹¹ *Ibídem*, p. 9.

¹¹² *Ibídem*.

¹¹³ *Ibídem*, pp. 10-11.

¹¹⁴ *Ibídem*, p. 12.

¹¹⁵ Se podía leer en aquel programa: «Nos encontramos con una sociedad extraordinariamente injusta, pues el 1 por 100 de los hogares españoles con mayor nivel de ingreso percibe el 22 por 100 de la

antiimperialista quedaba en aquel programa aunque mucho más atemperada: “El PSOE pretende realizar una síntesis armónica entre independencia nacional y la apertura al mundo exterior”¹¹⁶. Manteniendo, por lo demás, una ambigua y cambiante posición con respecto a la entrada en la OTAN¹¹⁷.

Los 5.371.866 votos obtenidos por el PSOE confirmaron, que se iba por el *camino adecuado* más allá de ideologías, doctrinas y textos exaltados. Funcionó a la perfección no sólo el tema de la memoria histórica sino un liderazgo fuerte, joven y renovado no atado al pasado más reciente ni al de la Guerra Civil. Las siglas funcionaron, qué duda cabe¹¹⁸, pero también el éxito residió en una campaña electoral socialista inteligente e innovadora, aunque aún frágil en algunos aspectos de comunicación, y que vino a mostrar, en suma, que los cuadros del PSOE se encontraban ampliamente capacitados en tales cuestiones. Aunque en la práctica no se estuvo lejos de una mayoría parlamentaria aritmética de la izquierda –sobre todo si se suman los votos del PSOE y el PSP y los del propio PCE– lo cierto es una hipotética victoria socialista hubiera condicionado el devenir del propio proceso de la transición a la democracia, por caminos difíciles de prever. Lo que no evitó, en todo caso, que más allá de la apuesta común ciudadana por una opción de centro-derecha representada por la UCD, dejará de ser relevante que las fuerzas políticas represaliadas e ilegales, prácticamente, hasta la convocatoria de las elecciones tuvieran tan amplios resultados.

Mientras tanto, el PSOE no sólo es que fuera la segunda fuerza más votada a un escaso millón de votos de UCD –en concreto, la candidatura de Adolfo Suárez obtendría 6.310.391 de votos, es decir, el 34,44% total del voto finalmente depositado y con 166 escaños¹¹⁹– sino que superaba ampliamente a su principal y tradicional competidor político por la izquierda –el PCE-PSUC, tercera fuerza política con 1.709.890 votos y el 9,33% y 19 escaños, quien se quedaría muy lejos de no pocos pronósticos electorales¹²⁰–. Se resolvían así las incertidumbres sobre un posible modelo electoral a la italiana. El sistema de D'Hondt pensado y trazado por las élites

renta total del país, en tanto que el 53 por 100 de los hogares de menores ingresos se reparten otro 22 por 100 de la renta nacional». No obstante, y realizada la consiguiente descripción estadística, las medidas socialistas iban en línea con una serie de inconcreciones que no traspasaban la buena voluntad de sus propias afirmaciones: «una reforma fiscal inmediata»; «[c]rear la figura penal del delito fiscal»; «[e]structurar el sistema fiscal». *Ibídem*, p. 16.

¹¹⁶ *Ibídem*, p. 24.

¹¹⁷ «El PSOE se opondrá a la firma de cualquier tratado o alianzas, bases o relaciones militares, así como a la renovación de las existentes, que no cuente con la aprobación en el Parlamento o por el referéndum, del pueblo español». *Ibídem*, p. 26.

¹¹⁸ Igualmente también aquellas *primeras* elecciones democráticas demostraron que las ‘siglas históricas’ del PSOE de Rodolfo Llopis pertenecían al pasado. De hecho, la candidatura del PSOE (Sector Histórico) tan sólo obtendrían 21.242 votos. Véase lo apuntado en la *nota 41*.

¹¹⁹ El resto de fuerzas electorales que obtuvieron representación serían las siguientes: Alianza Popular, 16 diputados con 1.504.771 votos; Partido Socialista Popular-Unidad Socialista, 6 escaños con 816.582; Pacte Democràtic per Catalunya, 11 escaños con 514.647 votos (5 escaños correspondieron a Convergència Democràtica de Catalunya, 4 a Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament y 2 a Esquerra Democràtica de Catalunya); PNV, 8 escaños con 296.193 votos; Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana de Catalunya, 2 escaños con 172.791 votos (1 escaño correspondió a UCD y otro a Centre Català); y con un escaño: Euskadiko Eskerra; Esquerra de Catalunya; Candidatura Aragonesa Independiente de Centro; y Candidatura Independiente de Centro. Por último, destacar como la candidatura de Joaquín Ruiz-Giménez al frente del Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español a punto estuvo de alcanzar uno o dos representantes en el Congreso con sus 215.841 votos obtenidos.

¹²⁰ Igualmente las elecciones del 15 de junio de 1977 resultaron aclaratorias del escaso atractivo que concitaron las siglas de la extrema izquierda –no ocurriría esto en el ámbito municipal como mostrarían sin ir más lejos las elecciones de abril de 1979– las cuales no obtendrían representación. Por ejemplo, la candidatura del Frente Democrático de Izquierdas que aglutinaba a fuerzas de la izquierda comunista y anticapitalista con presencia en el antifranquismo, a pesar de obtener 122.608 votos no obtuvo ningún representante a las Cortes.

reformistas del anterior régimen, cumplió su papel encomendado en la formación de amplias y estables mayorías parlamentarias. El modelo británico, que tan del agrado eran de Manuel Fraga adquiriría entonces una versión “latina”¹²¹.

En fin, el 29,32% de los votos cosechados, los 118 diputados y los 48 senadores abrían un escenario de enorme potencialidad. Asimismo, las elecciones de marzo de 1977 delimitarían, en adelante, las posibilidades electorales reales de las fuerzas políticas más importantes, tentativas golpistas de corto alcance aparte¹²².

Inaugurado el escenario electoral se daría paso a lo que los cuadros e intelectuales del PSOE denominaron como el *radicalismo posibilista*¹²³. Responsabilidad de estado, consenso, consolidación de la democracia, moderación... y un largo etcétera sustituirán a un discurso rápidamente envejecido. El que fuera dirigente socialista Francisco Bustelo durante la transición y la primera mitad de la década de los ochenta, y posteriormente uno de los mayores críticos del *felipismo*, resumía a posteriori este *doble lenguaje* de la siguiente forma:

«Ningún partido político es un centro de sabiduría y reflexión, pero el PSOE de los años setenta, e incluso de los ochenta, batía todos los récords en lo que se refiere a mantener de labios para afuera posiciones radicales, más bien superficiales, y de carecer de ideas claras sobre lo que había que hacer en el país, excepción hecha, claro es, de lo más evidente, como recuperar la democracia»¹²⁴.

Si se observa con detenimiento la posición que en cada momento tomó la dirigencia socialista con respecto a los pactos fundacionales de la transición postfranquista, se puede confirmar el largo trecho que siempre existió entre las posiciones oficiales, radicales o no, y el pragmatismo que marcaría las actuaciones reales del PSOE. Y esta constituye, precisamente, la nueva señal de identidad política que caracterizó al socialismo español en adelante.

Excelente ejemplo de la progresiva modificación de la estrategia socialista sería la propia negociación y firma de los Pactos de la Moncloa¹²⁵. El debate surgido entre los economistas y dirigentes socialistas en torno al pacto, que permitió asegurar la reestructuración del capitalismo español, es representativo de la nueva cultura política que iría instalándose. Dejando de lado el enfrentamiento y distanciamiento que se produjo en esta ocasión con el *sindicato hermano*, UGT, así como las controversias surgidas en el propio seno del PSOE, resulta

¹²¹ Sobre la posición del veteranísimo líder derechista al respecto, FRAGA, Manuel, *Memoria breve de una vida pública*, Barcelona, Planeta, 1993. No deje tampoco de consultarse la opinión de otro de los ‘honorables’ padres de la patria: MARTÍN VILLA, Rodolfo, *Al servicio del...*, *op.cit.*. O las siempre más comedidas opiniones de, HERRERO DE MIÑÓN, Miguel, *Memorias de estío*, Madrid, Temas de Hoy, 1993. Asimismo no deje de observarse una pretendida visión elitista-conservadora sobre el papel de estos personajes en, PALOMARES, Cristina, *Sobrevivir después de...*, *op.cit.*.

¹²² Véase, en primer lugar, AHFPI, PSOE, *Análisis de las elecciones generales 1977*, Madrid, PSOE, 1977, sig. Fc 63; segundo, GARCÍA DELGADO, José Luis y SERRANO SANZ, José M^a, “De la crisis energética a las elecciones del 77: tiempos de incertidumbre” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *Economía española de...*, *op.cit.*, pp. 3-21; MONTERO, José Ramón, “Las elecciones legislativas” en COTARELO, Ramón (comp.), *Transición política...*, *op.cit.*, pp. 243-297; y, LAGO PEÑAS, Ignacio, *El voto estratégico en...*, *op.cit.*. Desde una perspectiva historiográfica, POWELL, Charles (ed.), *Las primeras elecciones democráticas veinte años después*, Madrid, Congreso de los Diputados, 1998.

¹²³ HEYWOOD, Paul, “Mirror-images: The...”, *op.cit.*, p. 203.

¹²⁴ BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, pp. 128-129. El mismo ex-dirigente socialista reconocía asimismo la evidencia que aquí queremos destacar: «El español pasó así de ser el partido socialista más radical de la Europa occidental a ser el más moderado, sin saber muy bien el porqué de lo uno y de lo otro». *Ibidem*, p. 129.

¹²⁵ Referencias básicas sobre esta importante cuestión pueden consultarse en el Capítulo 3, *nota 300*.

revelador la posterior justificación *sine die* de la firma de estos acuerdos¹²⁶. De nuevo, el examen de José Félix Tezanos es concluyente:

«El PSOE apoyó y cumplió dichos pactos sin olvidar que su papel era, también, defender en pasos ulteriores aquellos objetivos –tantas veces postergados en la historia de España– de modernización social, europeización e impulso de las políticas sociales y redistributivas»¹²⁷.

La realidad es que la firma de los Pactos de la Moncloa no formaban parte de la estrategia de la modernización del PSOE, ni mucho menos ésta había sido formulada por la propia organización socialista, que por aquel entonces mantenía su propuesta de construcción de una *sociedad alternativa*. En todo caso, aquel debate tuvo la virtud de terminar con la etapa de

¹²⁶ La negociación y posterior firma de los Pactos de la Moncloa generaron un fuerte debate en el seno del partido. La UGT se negó a firmarlos en un principio, mientras que los que se autodefinían a sí mismos como el ‘ala derecha’ estuvieron a favor de los mismos como en el caso de Carlos Solchaga. Quien llegaría a ser Ministro de Economía señalaría en sus *memorias*: «Igualmente me encuadré en el grupo inicialmente minoritario en el PSOE que defendió la conveniencia de los Pactos de la Moncloa (aunque no estuviera de acuerdo con algunos de sus contenidos)». SOLCHAGA, Carlos, *El final de...*, *op.cit.*, p. 17. Por el contrario, la UGT representada por su Secretario General, Nicolás Redondo, ha recordado tiempo después: «Por ejemplo, nosotros nos oponíamos con más fuerza a los Pactos de la Moncloa. No veíamos por qué teníamos que asumir una serie de sacrificios [...]. Todavía no había entrado en una profunda crisis el sistema socialdemócrata de reparto de papeles». En declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 206. La oposición a los citados *pactos* llevaría a UGT a la creación de una Plataforma Reivindicativa a partir de unas objetivos mínimos, resumidos de las siguiente forma: 25 pesetas de salario mínimo; 8.000 pesetas netas de aumento lineal; en contra del despido libre; 40 horas de trabajo a la semana... Remarcando su negativa a los pactos «por considerar que es un Pacto Social que no consigue mejoras importantes ni suficientes para los trabajadores, mientras que sí reduce nuestro nivel de vida, cargando una vez más sobre nuestras espaldas las consecuencias de los errores económicos de la sociedad capitalista». AHFFLC, UGT, “No al Pacto de la Moncloa” [octavilla], Madrid, noviembre de 1977, sig. 185-17. Como otros de los muchos debates y dilemas a las que se vio sometida la dirección socialista, la solución fue la misma que en anteriores ocasiones: las decisiones se tomaron por parte de un reducido grupo de dirigentes. Incluso no todos los miembros del CE del PSOE estuvieron informados sobre los pasos y los tiempos políticos de aquel decisivo *pacto*. El otro elemento, como han destacado varios testimonios, fue la ausencia de debate y de crítica en la toma de las decisiones. De nuevo recurrimos al testimonio revelador de Francisco Bustelo que por su interés transcribimos completamente: «También intente participar, puesto que no me dejaron, pero sí criticar los llamados Pactos de la Moncloa en su vertiente económica. Como es sabido, aquellos pactos, suscritos al margen de las Cortes, consistieron en la búsqueda en la Presidencia del Gobierno, en torno a Adolfo Suárez, de un denominador común en materia política y económica [...]. Redacte un estudio crítico, desde el punto de vista de la izquierda, del contenido económico de los pactos, que repartí en un Comité Federal del PSOE con gran disgusto de mis queridos compañeros de la Comisión Ejecutiva, que se negaron a que se discutiera. Claro está que yo entonces no sabía que los gobiernos socialistas posteriores iban a aplicar una política económica liberal y nada socialdemócrata. Sé muy bien como economista que esto último hubiera sido muy difícil, pero a mí me sorprendía, tal como se puso de manifiesto con la firma de los Pactos de la Moncloa, que ni siquiera se plantease esa posibilidad. No sólo fueron superficiales algunas de las soluciones arbitradas en aquel entonces; tampoco había necesidad de que, en ciertas materias al menos, suscribiesen los pactos los partidos de izquierda. Los pactos además, cometieron el error, que todavía veinte años después se deja sentir en la economía española, de centrar todos los esfuerzos en la lucha contra la inflación y olvidarse del paro. Pero, con independencia de su contenido, lo que era sorprendente es que un órgano del PSOE –en este caso el más importante del partido después de los congresos– no aceptaran propuestas distintas a las oficiales». BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, pp. 147-148. Sobre esta cuestión volveremos detenidamente en el apartado “9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. *Los arduos inicios de la flexibilización* (octubre 1976-marzo 1980)”.

¹²⁷ TEZANOS, José Félix, “El PSOE entra en democracia” en id. (coord.), *PSOE 125...*, *op.cit.*, p. 132.

“timidez” en lo que se refiere a la política económica del socialismo¹²⁸. Ahora bien, una vez firmados, y más allá de las posteriores críticas, los mismos *Pactos de la Moncloa* pasaron a constituir el eje –así se mantenía en la documentación interna socialista– de la futura política económica de un posible gobierno socialista¹²⁹.

A los pocos días de los siempre mencionados *Pactos de la Moncloa*, y tras haber mantenido un absoluto silencio –o si se prefiere *falta de información* como sería norma en otros asuntos de calado– por parte de la dirigencia socialista con respecto a su base militante, la Secretaria de Prensa e Información, bajo la batuta de Javier Solana, enviaría una *circular* dirigida a las Agrupaciones, Federaciones y miembros del Comité Federal. En un tono bastante apaciguado, se llevaba una lectura de los *pactos* en base a los calificados *objetivos del PSOE en el terreno económico*. Tras advertir que “[d]entro de las limitaciones que un acuerdo programático de consenso lleva siempre implícitas, el PSOE pretende obtener tres grandes objetivos generales en el terreno económico”: a) “Desmontaje de los enquistamientos franquistas dentro del aparato económico del Estado”, en relación con la idea de lograr una “transparencia total en la gestión de TODO el gasto público”, y con el objetivo de “dar un duro golpe a la corrupción”; b) “Limitar la brutalidad de las medidas estabilizadoras”, vinculando este punto con el fin de que “los salarios no crecieran por debajo de los precios”. Y finalmente que “el seguro de desempleo y la evolución de las pensiones paliarán la situación de parados y pensionistas y jugarán el papel de re-distribuidor de renta”; c) “Conseguir una serie de contrapartidas que mejoraran la situación de las clases populares”. A saber: la mejora de la Seguridad Social; “el mejoramiento de las condiciones de adquisición y alquiler de las viviendas con la consiguiente persecución de la especulación”; el “conocimiento y control por parte de los trabajadores de la marcha de la empresa”. Admitiendo, en paralelo, que sobre lo anterior dichos “objetivos han sido conseguidos con ciertas limitaciones”. Así mismo se marcaban otros tres fines parcialmente alcanzados, al menos, sobre el papel: “[c]onsecución inmediata de un sistema fiscal progresivo”; “[m]ejora en la educación”, y “[l]as reformas agrarias tendentes a erradicar la marginación y explotación general del campesinado”. Junto a los datos que se manejaban en la larga *circular* socialista, la misma concluía con un mensaje a los afiliados:

«Es preciso insistir que el programa que sale del presente acuerdo programático no es programa del PSOE y, por tanto, deja abierta una amplia alternativa socialista al mismo [...]. El PSOE debe mostrar ante el pueblo dos alternativas, de un lado la alternativa capaz de profundizar en un programa democrático dadas las insuficiencias del acuerdo presente y, de otro, ofreciendo su alternativa para cumplir el acuerdo ‘mínimo’ actual, caso de que el Gobierno sea incapaz de cumplir lo acordado»¹³⁰.

¹²⁸ MUÑIZ, Miguel, “La estrategia económica del PSOE”, *Zona Abierta*, nº 23, (1980), p. 20

¹²⁹ Al albur de la presentación de una larga ponencia de Enrique Barón y otros economistas socialistas sobre los “Condicionantes y líneas básicas del programa del P.S.O.E” en una reunión del Grupo Federal de Economistas del PSOE en Madrid en marzo de 1978, tal y como recoge el informe redactado por Carlos Solchaga: «Fueron bastantes las críticas a la ponencia, pero quizás la más fulminante fue la de Felipe González [...]. Aconsejó tomar como hipótesis más probables: a) la llegada al poder dentro de este año en una posición no mayoritaria; b) la llegada al poder en 1979 como fuerza mayoritaria después de las próximas elecciones legislativas. Insistió en la idea de que un partido de oposición con ambición de poder debe plantear siempre un programa de gobierno –mayoritario o minoritario– y no un simple programa a la contra de oposición [...]. Recordó que, en cualquier circunstancia, a lo largo de 1979 nuestra política tenía que pasar por los Pactos de la Moncloa y que no éramos nosotros quienes debíamos salirnos de los mismos». AHFFLC, Fondo Saracíbar, Carlos Solchaga, “Informe sobre la reunión del Grupo Federal de Economistas del PSOE, Madrid, 11 y 12 de marzo de 1978”, Bilbao, 22 de marzo de 1978, sig. 002265-005, p. 4.

¹³⁰ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE, Secretaria Prensa e Información, “Circular nº 73”, Madrid, 31 de octubre de 1977, sig. 002265-002, pp. 1-2 y 6, respectivamente.

Meses más tarde de aquel 25 de octubre de 1977 en un documento del Grupo Federal de Economistas del PSOE titulado, “Análisis de los Acuerdos Económicos y Políticos”¹³¹, se presentaría un esfuerzo ingente en explicar por qué y cómo se habían firmado unos pactos económicos, que en sus aspectos sociales nunca se cumplirían¹³². Dos *ideas-fuerzas* de nuevo aparecían: la de la política de la responsabilidad y la del riesgo de la parálisis institucional. Pese a todo, el PSOE seguía manteniendo una visión marxista clásica de la crisis económica, por más que los principales economistas socialistas siempre se mostrarán más cómodos con las visiones socialdemócratas o directamente socio-liberales¹³³. Si difícil había sido mantener el orden en el seno de la organización, otro tanto lo sería explicar no tanto las causas de su firma sino la vigencia y necesidad de aquellos *pactos*. Y es en este punto, justamente, en donde sí se puede ver de forma meridianamente clara las causas de la estrategia política adoptada.

Se señalaría en aquel documento que los *Pactos de la Moncloa*, en términos generales, habían significado la aceptación de tres reivindicaciones socialistas de carácter histórico: 1) *el traspaso de las cargas a las clases dominantes*; 2) *la cuestión del traspaso de las rentas no monetarias*¹³⁴; 3) *la liquidación los núcleos de poder franquistas*. ¿Fueron realmente éstas sus efectos? No¹³⁵. Sin embargo, aquel grupo de economistas socialistas remarcaban que si los acuerdos se habían firmado no era por concesión alguna, sino por un ejercicio de responsabilidad con el proceso de consolidación del proceso democrático:

«Tal como se ha especificado a lo largo de los puntos anteriores el texto final de Acuerdo de la Moncloa, debe considerarse como un consenso ‘mínimo’ desde la perspectiva de la política del Partido. Se trata de unas bases que, de cumplirse, permiten salir progresivamente de la crisis económica a la vez que afianzan el proceso democrático del país. No deben contemplarse, por tanto, como un intento de negociación de nuestro programa, aunque en el Acuerdo se han incorporado muchos aspectos específicos que están incluidos en aquél»¹³⁶.

¹³¹ AHFPI, PSOE, Grupo Federal de Economistas, “Análisis de los acuerdos económicos y políticos. 1ª parte. El acuerdo económico de la Moncloa: análisis y valoración”, Madrid, noviembre de 1977, sig. Fa 22. Véase en concreto el *anexo*, “Comparación de la propuesta inicial del Gobierno, de la propuesta del PSOE y del acuerdo final para cada una de las subcomisiones”.

¹³² Véase lo apuntado en la *nota 126*.

¹³³ «La solución para enfrentarse con esta nueva problemática fue la táctica utilización del mecanismo inflacionista como elemento redistributivo. La inflación es, entre otras cosas, una manifestación de la lucha de clases, en el sentido de que el aumento de los precios se pretende conseguir, a tenor de la mayor fuerza reivindicativa del trabajo o del capital, una diferente distribución de la renta o mantener posiciones privilegiadas dentro de la misma». AHFPI, PSOE, Grupo Federal de Economistas, “Análisis de los acuerdos económicos y políticos. 1ª parte. El acuerdo económico de la Moncloa: análisis y valoración”, Madrid, noviembre de 1977, sig. Fa 22, p. 1. Por lo demás, sobre el citado Grupo Federal de Economistas o lo que también se conoció en su momento como el ‘gobierno en la sombra’ de Felipe González, nos remitimos al Capítulo “5. Gabinetes «tecnocráticos» y «liberales» para los nuevos tiempos”.

¹³⁴ Se afirmaría allí, a modo de ejemplo: «No debe olvidarse que *los trabajadores españoles se enfrentan ante la crisis muy desarmados*, mientras que el capital oligopolístico tiene grandes mecanismos de defensa. Esta óptica de *proceder a un reajuste de fuerzas, pasando poder del capital al trabajo era fundamental de cara a las negociaciones*». AHFPI, PSOE, Grupo Federal de Economistas, “Análisis de los acuerdos económicos y políticos. 1ª parte. El acuerdo económico de la Moncloa: análisis y valoración”, Madrid, noviembre de 1977, sig. Fa 22, p. 2 [*cursiva en el texto original*].

¹³⁵ Nos remitimos aquí al Capítulo “7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de crecimiento”.

¹³⁶ AHFPI, PSOE, Grupo Federal de Economistas, “Análisis de los acuerdos económicos y políticos. 1ª parte. El acuerdo económico de la Moncloa: análisis y valoración”, Madrid, noviembre de 1977, sig. Fa 22, p. 7.

Todo lo anterior explica, como ningún otro documento y/o declaración, lo que aquí definiremos como la *estrategia posibilista de la conquista del poder político*¹³⁷. En todo caso, ser parte del proceso político de cambio y a su vez oposición no resultó sencillo. Pues como el propio PSOE recordaba al final del informe, la única opción de salida real a la crisis, tanto económica como política, pasaban por la *alternativa de poder que representaba el PSOE*:

«En este sentido, debe entenderse que la alternativa de poder al Gobierno UCD se articula, bajo cualquiera de las circunstancias, en torno al PSOE. Si el programa fracasa, esta constatación es obvia. En el caso de su cumplimiento, lo cual es deseable desde la perspectiva de la consolidación de la democracia, la alternativa continúa siendo socialista, con la ventaja de que se habrán despejado toda una serie de impedimentos que, en la situación actual, harían difícil, muchos más conflictiva y seguramente menos eficaz la opción gubernamental socialista»¹³⁸.

Un año después en otro informe publicado por la organización socialista, “Balance de los Acuerdos de la Moncloa” en diciembre 1978, y clarificado en parte el proceso de cambio, la valoración se tornaba en negativa en cuanto a sus objetivos más inmediatos:

«Los trabajadores tenían, como en todo compromiso, deberes que cumplir y derechos que exigir. Sus deberes fueron cumplidos con plenitud, puesto que la masa salarial global no rebasó la cota prevista del 20%. Sus derechos han sido escamoteados en buena medida por la falta de voluntad política del Gobierno o por la cesión de éste ante presiones externas»¹³⁹.

Y profundamente negativa en lo que se refiere a su computo final: “Esta evaluación global, es pues, rotundamente negativa. Pero nosotros no queremos ofrecer sólo una evaluación global”. No faltaban tampoco los culpables en aspectos esenciales más allá del Gobierno de la UCD: “La política redistributiva, básicamente centrada en la reforma fiscal, presenta los mejores cumplimientos, aunque marcha con retraso, a la vez que ciertos grupos de presión han conseguido reducir la progresividad del proyecto inicial”¹⁴⁰. Ahora bien, pese a todo se reconocía, que, “[l]os Acuerdos de la Moncloa sirvieron, por encima de su grado de cumplimiento, para crear un clima de seguridad ciudadana en una etapa difícil, para complementar la fuerza que el Gobierno no tenía por sí mismo, para conducir el proceso de tránsito”, y especialmente, “para generar algunas expectativas de las que los ciudadanos carecían en octubre del año 77”¹⁴¹.

Este entrecruce de caminos –como señalábamos unas líneas más arriba– muestran las contradicciones por la que atravesó el socialismo español en este tiempo preciso. Así pues,

¹³⁷ En la construcción de esta estrategia no faltaron reminiscencias al fuerte pasado anti-comunista del PSOE. Por ejemplo, al plantear que la negociación de los Acuerdos constituía una especie de conspiración entre el Gobierno de Suárez y el PCE –y a su vez de CCOO–: «Ante este planteamiento y dado que la actitud de la otra fuerza de la izquierda, el PCE, estaba predeterminada por una aceptación previa y presumiblemente pactada del Acuerdo, la llamada de la Moncloa ¿era una trampa tendida exclusivamente al PSOE? En la fracasada opción del PCE de un gobierno de concentración, la aceptación sin condiciones del Acuerdo se inscribía en esta óptica. Ante toda actitud de compromiso y a tenor de los resultados del 15 de junio, el PCE tiene muy poco que perder, mientras que el PSOE se juega mucho en cada opción». AHFPI, PSOE, Grupo Federal de Economistas, “Análisis de los acuerdos económicos y políticos. 1ª parte. El acuerdo económico de la Moncloa: análisis y valoración”, Madrid, noviembre de 1977, sig. Fa 22, p. 1.

¹³⁸ AHFPI, PSOE, Grupo Federal de Economistas, “Análisis de los acuerdos económicos y políticos. 1ª parte. El acuerdo económico de la Moncloa: análisis y valoración”, Madrid, noviembre de 1977, sig. Fa 22, p. 1.

¹³⁹ AHFPI, PSOE, “Balance de los Acuerdos de la Moncloa”, Madrid, diciembre de 1978, sig. Fc 1327, p. 2.

¹⁴⁰ AHFPI, PSOE, “Balance de los Acuerdos de la Moncloa”, Madrid, diciembre de 1978, sig. Fc 1327, p. 2.

¹⁴¹ AHFPI, PSOE, “Balance de los Acuerdos de la Moncloa”, Madrid, diciembre de 1978, sig. Fc 1327, p. 1.

iniciado el tramo definitorio de la institucionalización del nuevo modelo político, el PSOE priorizaría su alternativa de poder. Lo que se comenzará a aprobar en los Congresos, reuniones de la CEF o en el propio Comité Federal en materia de política e ideología, de poco, muy poco, valdría ante la creciente validez del “programa reformista” del PSOE expuesto y puesto en marcha en la práctica. El objetivo había cambiado, no se trataba ya de transformar la sociedad capitalista, sino de moderar y adecuar un programa electoral que no asustase a las clases medias –potencial electorado en busca– ni a las clases dominantes¹⁴².

Buena muestra de lo anterior sería la importante reunión de la CEF del PSOE el 15 de octubre de 1978, tras un año de los *Pactos de la Moncloa* y apenas cinco meses para la celebración de las siguientes elecciones generales¹⁴³. Nos encontramos en un momento especialmente interesante de cara a la futura transición programática socialista, una vez que en la práctica se había consensuado con la UCD el texto de la futura Constitución, y se estaba la espera de la convocatoria del futuro referéndum constitucional previsto para antes de final del año setenta y ocho¹⁴⁴. Contextualizado el asunto, debe añadirse que pocos documentos como el *informe de gestión* de la Comisión Ejecutiva como el salido de aquella reunión son tan clarificadores de todo lo dicho hasta aquí.

Con el objetivo de realizar un balance “del desarrollo de nuestras actividades a lo largo del primer año de experiencia democrática”, se adjuntaba, en primer término, el “Informe al Comité Federal” del 1 de julio de 1979¹⁴⁵. En este primer documento de debate de la CEF, se llevaba a cabo un análisis histórico de la situación del país que se remontaba desde la II República al presente. A partir de una *particular* interpretación de la reciente historia de la nación, el propio texto no dejaba de remarcar la que sería una constante desde entonces: auto-representarse como el partido de la democracia, de los trabajadores y de los grandes avances sociales y políticos de la historia contemporánea del país. Señalando:

«Salvando las distancias, que son duda las hay y notables, ese momento culminante en la historia del Socialismo se repite en la nueva experiencia democrática española que se inicia con las elecciones de 15 de [j]unio. Aun sin el Partido responsable del poder ejecutivo, incluso nuestros detractores y oponentes políticos, coinciden en afirmar que somos la fuerza política decisiva para el éxito de la consolidación democrática»¹⁴⁶.

¹⁴² Al respecto resulta enormemente ilustrativo el trabajo de, HILL, Christopher, *The role of elites in the Spanish Transition to democracy (1975-1981): motors of change*, Lewinston, New York, Edwin Mellen Press, 2007.

¹⁴³ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006. Se trata de un informe mecanografiado de 45 folios agrupado en diferentes epígrafes y escrito en primera persona. Es decir, probablemente, por Felipe González a la sazón Secretario General del PSOE, y por tanto máximo responsable ante el CE y la CEF. Igualmente es de interés, aunque en todo caso menor con respecto a esta reunión citada por la posterior aceleración de los acontecimientos políticos, el informe de la reunión previa de la CEF los días 4 y 5 de marzo de aquel año, consultables en: AHFPI, PSOE-CE, “Informe de gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal”, Madrid, 1978, vol. I, sig. C 2740.

¹⁴⁴ Sobre el posicionamiento del PSOE en torno a la Constitución y concretamente sobre los apartados económicos, JUAN ASENSJO, Oscar de, “La constitución económica española de 1978 y el PSOE”, *Sistema*, nº 53, (1983), pp. 95-106. E igualmente, DÍAZ, Elías, “El Estado Democrático de Derecho en la Constitución española de 1978”, *Sistema*, nº 41, (1981), pp. 41-86.

¹⁴⁵ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006.

¹⁴⁶ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 5.

Después de calificar como “atípica” la transición a la democracia que se estaba viviendo, y ante la situación de “provisionalidad”, se recalca que “la relación de fuerzas resultante de las elecciones”, y con un “Gobierno de la UCD” en “minoría mayoritaria”, el marco de actuación en que el PSOE tenía que saber jugar era el del “consenso”. Añadiendo que una vez “asumida” dicha política, “la responsabilidad de los socialistas en el afianzamiento de la democracia” era total. La aceptación y firma de los *Acuerdos de la Moncloa* había constituido un “sacrificio y una cierta renuncia, pero exigimos lo máximo posible”. La contrapartida, según la CE del PSOE, estaba en que aquella firma “hiciera posible el mantenimiento en el poder de un confuso gobierno de derechas durante el tiempo concertado, que nos permitiera también acabar la tarea constituyente”¹⁴⁷.

Téngase presente que a la altura del 1 de julio, fecha del reseñado informe, todavía estaba pendiente el último trámite para la aprobación definitiva del articulado de la futura Constitución¹⁴⁸. Si todo marchaba como era previsible el calendario político quedaba meridianamente claro. Aprobado el texto Constitucional, realizado el referéndum, las segundas y futuras elecciones legislativas estaban cada vez más próximas. Ya no sólo se partía de la *sorpresa electoral* del año anterior, sino es que “[s]egún los sondeos de opinión” las tareas de oposición realizadas hasta el momento “están dando un balance positivo para los socialistas y negativo para el Gobierno”. Dentro de la más estricta lógica del electoralismo saldría una *lectura clarividente*: “el electorado sólo encuentra dos opciones específicas de poder: una, protagonizada por la continuación del equipo actual, otra, protagonizada, por los socialistas”. Aunque se advertía que no se podía caer en un simple electoralismo, visto lo visto, se avisaba como “[a]lgunos compañeros no se sienten todavía cómodos cuando se utilizan sondeos electorales como punto de partida de análisis políticos”. Insistiendo “[e]llo es comprensible, aunque no admisible”. Dicho esto, y tras revisar “un conjunto de factores complejos”¹⁴⁹ que habían mejorado notablemente las posibilidades de acceso al poder, se concluía como,

«[h]ay un amplio sector de nuestro pueblo, más aún que el representado por nuestros votantes, actuales y potenciales, que piensa que el futuro inmediato, y tal vez no tan inmediato,

¹⁴⁷ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, pp. 5, 6 y 7, respectivamente.

¹⁴⁸ En la *Resolución* aprobada por el Comité Federal del PSOE celebrado el 1 y 2 de julio de 1979, incluida en el citado *informe de gestión*, se señalaba en el primer punto lo siguiente: «Habiendo examinado el proyecto de Constitución, tal y como se tiene en el dictamen que será debatido en el Pleno del Congreso de los Diputados, a partir del próximo día 4, el Comité Federal se pronuncia positivamente a favor del mismo [...]. El Partido Socialista expresa su satisfacción ante el hecho de que se haya obtenido un texto constitucional como el reflejado en el actual proyecto, a través del acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento que contribuyeron a restablecer la democracia en nuestro país [...]. El proyecto constitucional actual es satisfactorio también en tanto que ofrece cauces constitucionales para realizar las aspiraciones legítimas de su autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado, a la vez que garantiza la solidaridad entre todas ellas. Una vez más el PSOE entiende que el socialismo se identifica con la democracia, que la misión histórica del Partido exige la consolidación de la democracia y que, en definitiva, el socialismo no es sino la profundización de la democracia en todos los aspectos de la vida colectiva de los pueblos». AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Resoluciones del Comité Federal*, 2 de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 19.

¹⁴⁹ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, pp. 8-9. Entre el conjunto de los *factores complejos* se apuntaban, entre otros, los siguientes: «-el desencanto por el ambiguo comportamiento del Gobierno; -la paulatina desaparición de miedos y recelos [...]; -la esperanza de que los socialistas puedan sanear la Administración [...]; -la confianza en que un gobierno del PSOE pueda sacar el país de la crisis económica y hacer una serie de tareas de cumplimiento de las reformas, previstas en los compromisos socio-económicos, ya acordadas» (p. 10).

depende de la capacidad que demuestren los socialistas para resolver los problemas por los que atraviesa nuestro país»¹⁵⁰.

Si los sondeos no ofrecían dudas, menos dudas ofrecía el *camino* a seguir. Se decía allí literalmente: “el partido vive el fenómeno de la confrontación entre la acumulación ideológica” y “la necesidad de realizar una práctica política que tenga en cuenta todas las circunstancias esbozadas”. Todo lo cual se concretaba en que “para realizar la misión histórica a que indudablemente está comprometido en esta coyuntura” el socialismo debía desprenderse de *viejas* consignas y postulados superfluos¹⁵¹. De esta forma, y sin prácticamente anuncio previo, aparecía el que se convertiría, en muy breve tiempo, en uno de los soportes ideológicos-políticos del socialismo: la *misión histórica* del socialismo español, de la que hablaremos en las siguientes páginas.

En un previsible escenario a corto plazo y de cara a preparar las siguientes elecciones, tras constatar que “[e]ntre nosotros existen sectores que tienen miedo a gobernar [...], otros sectores que tienen prisa por gobernar; otros que valorando peligros y ventajas, están dispuestos asumir la responsabilidad que democráticamente les confiera el pueblo”, aparecían tres grandes preguntas: 1. “¿Para qué gobiernan los socialistas? ¿Con qué programa y con qué mandato popular?”; 2. “¿Tenemos estrategia de poder?”; 3. “¿Tenemos una organización capaz de asumir, difundir y apoyar decididamente la política que realice este gobierno?”¹⁵². Tras presentar varias hipótesis de futuro, y volver a remarcar el problema de la *sobreacumulación ideológica*, se decía “[e]s necesario pues llegar a una síntesis entre las aspiraciones mayoritarias del pueblo y el trozo de camino que ha de recorrerse en cada legislatura desde una óptica socialista”. En esa tesitura, el socialismo se veía abocado, a “ir afianzando el sistema democrático”. Y aquello consistía en democratizar las instituciones, dotarse de un programa moderado en lo económico y de paso establecer un “sistema de relaciones industriales” de corte democrático. Se imponía un *giro al centro* —o si se prefiere a *la derecha*— más o menos camuflado en base a la consolidación de la democracia como tarea prioritaria¹⁵³.

A pesar que el camino marcado estaba dibujado se partía de un análisis, que no exento de voluntarismo, percibía de forma realista algunos cambios políticos y sociales de relevancia. Sin embargo, el mismo documento pecaba de autocomplaciente cuando no de contradictorio a la hora de responder a la segunda de las preguntas formuladas:

¹⁵⁰ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 10.

¹⁵¹ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, pp. 10-11.

¹⁵² AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 11

¹⁵³ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, pp. 13-14. Se remarcaba allí lo siguiente: «Este esbozo programático está conectado con las más claras aspiraciones populares, y cuando algunos nos acusan de electoralistas dentro o fuera del partido [...] para obtener la mayoría por la derecha, es decir en competencia con la Unión de Centro Democrático, debemos recordar que esto es hipócrita en su primera parte, porque cualquiera que aspira a gobernar en democracia necesita el apoyo mayoritario del electorado» (p. 14). Una posición que sería duramente criticada por parte de algunos cuadros socialistas. Por citar tan sólo un ejemplo: GOMÁRIZ, Enrique, “El espacio electoral del PSOE”, *Leviatán*, nº 1, (1978), pp. 99-115, quien denunciaba abiertamente como «nuestros técnicos electorales, nuestros parlamentarios y nuestros compañeros de dirección [...] comienza a repetirse la idea de que para incrementar nuestro cauce electoral hemos de ganar votos por la derecha. Tal idea encuentra resistencia entre algunos de estos compañeros, por lo que no se deciden a explicarla». *Ibidem*, p. 99.

«Disponemos de cuadros suficientes para preparar la estrategia de ocupación del aparato del Estado a nivel ejecutivo. Sólo tenemos que poner en marcha un plan con urgencia y con eficacia para cubrir este hueco. Asimismo tenemos suficientes medios para elaborar un programa razonable con objeto de cubrir los objetivos señalados anteriormente»¹⁵⁴.

Ni muchos menos el PSOE disponía de la capacidad organizativa para asumir el gobierno con las necesarias condiciones en aquella altura¹⁵⁵. No obstante el problema, siempre según el citado informe, no provenía de esta cuestión, pues “la organización como colectivo no está en condiciones, no ya de difundir y apoyar ese programa de gobierno, sino tan siquiera de asumirlo como suyo propio”. En resumen, “la disociación entre la base militante y el gobierno socialista” resultaba un escollo a tener en cuenta. Y es que había que explicar a esa misma base militante disconforme con la progresiva moderación socialista, que en base a los *Acuerdos de la Moncloa* se planteaban una directrices, que gustarán o no, presentaban ya un futuro programa de gobierno que “con algunas variantes de protección del empleo y de política del sector público, habría de ser de forma casi inexorable el que los socialistas realizarán”¹⁵⁶. Todo un ejemplo del creciente *pragmatismo liberal*. Puesto el freno en torno a un exceso de *idealismo*, y con la complicación de cómo conectar con la base, “[d]ebemos concluir por tanto que en el momento actual no contamos con una organización con clara consciencia de cuál puede y debe ser el papel histórico del partido socialista en el supuesto de que asuma la responsabilidad de gobernar”¹⁵⁷. A resultas de lo cual tocaba transmitir desde la *vanguardia* “sin demagogias ni justificaciones catastrofistas ese convencimiento”.

En la segunda parte del *informe de gestión* se presentaba la “Estrategia del PSOE tras la Constitución”. La coyuntura política había cambiado velozmente y con ella la estrategia a definir por la CEF en la reunión del 15 de octubre de aquel año¹⁵⁸. Partiendo de lo que se autocatalogaba una “óptica democrática progresista”, y ya en trámites de cara a la aprobación por parte del pleno del Congreso de los Diputados del texto constitucional –hecho que tendría lugar el 31 de octubre– de nuevo la futura celebración de las elecciones generales concentraba toda la atención.

El *consenso político* quedaba ahora como una rémora del pasado. Todo ello en poco menos de tres meses. Advirtiéndose, de entrada, que en caso de un futuro gobierno socialista, el programa a desarrollar se vería notablemente constreñido ante la realidad política, social y económica del país. Todas las precauciones eran pocas en palabras de Felipe González.

«La celebración de elecciones generales puede permitir una alternativa de poder y nuclear la tarea postconstitucional en torno a un gobierno socialista. ¿Qué significa esto? Desde luego, no pretendemos afirmar que ese cambio de relaciones de fuerzas comporte la posibilidad de realizar un programa socialista de gobierno, tal como vendría definido por la acumulación ideológica de la que hablé en el informe al Comité Federal. Pero, como socialistas, como

¹⁵⁴ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 15.

¹⁵⁵ Ilustrativos son los datos manejados por, RÍOS, César Alonso y ELORDI, Carlos, *El desafío socialista...*, op.cit..

¹⁵⁶ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, pp. 15-16.

¹⁵⁷ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Informe al Comité Federal*, 1º de julio de 1978”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 17.

¹⁵⁸ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *La estrategia del PSOE tras la Constitución*”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006. Véase, aquí también, GUERRA, Alfonso, “Estrategia de Poder”, *Leviatán*, nº 1, (1978), pp. 45-56.

milитantes de izquierda, hemos de tener en cuenta que, una vez aprobada la Constitución, la democracia ya tendrá un perfil definido, pero no un contenido concreto [...]. Así mismo, hemos de considerar que, acabado el periodo previsto en los Acuerdos de la Moncloa, e incumplidos en buena parte los que suponían reformas estructurales, el Gobierno de los próximos años habrá de encarar la superación de la crisis económica según los criterios que le sean propios»¹⁵⁹.

En ese marco de incertidumbre y provisionalidad, y teniendo presente el evidente *peligro* de un nuevo triunfo de la UCD, el PSOE se veía en la estricta obligación de marcar diferencias: “la negativa a prolongar el modelo político de la provisionalidad, alargando la práctica del consenso en materia político-económica y obligando a que se discutan en el Parlamento todas y cada una de las medidas que con rango de ley haya de tomar el poder ejecutivo”. Por ahí vendría, entonces, la diferenciación con el principal adversario político, a quien se criticaba dura y largamente. Aunque eso sí con todos los matices necesarios –con el *no cuestionamiento* de la economía de mercado por delante– en tanto, “los socialistas ni hemos pretendido, ni pretendemos adoptar actitudes que dificulten el saneamiento de nuestra economía como elemento fundamental de afianzamiento democrático”¹⁶⁰.

Evaluada la correlación de fuerzas y las estrategias de acción inmediatas de la UCD, el PCE y de otras fuerzas políticas, se daba paso finalmente al punto clave: “Preparación y movilización general del PSOE”¹⁶¹. Consolidar la “Alternativa Socialista” y preparar, coordinar y tensar la organización se constituían en las prioridades. Y para este fin, y como se hacía constar, se ponía en “marcha un Gabinete Técnico” encargado de preparar el futuro acceso al poder¹⁶². Si el mismo Gabinete tenía encomendada la función de mejorar la “imagen del partido”, en todo caso –y una vez más– el obstáculo a resolver se concentraba en torno a la militancia socialista: “nuestra acción militante ha decaído, lo cual puede ser grave a la hora de afrontar una estrategia de oposición o de poder”. Se imponía pues un “aumento de la militancia orgánica en el Partido” y un “aumento de la militancia sindical en la UGT”¹⁶³.

Surgía de allí, junto con el futuro estrechamiento de relaciones con la UGT, un ambivalente análisis sobre la militancia socialista¹⁶⁴. Y decimos *ambivalente*, ya que si, por un lado, aquella misma militancia era la más reacia a aceptar determinados cambios en las orientaciones del Partido según la propia dirección, por otro lado, la misma devendría en central de cara a aumentar el apoyo social y sobre todo electoral del socialismo.

¹⁵⁹ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *La estrategia del PSOE tras la Constitución*”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, pp. 28-29.

¹⁶⁰ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *La estrategia del PSOE tras la Constitución*”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 29.

¹⁶¹ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Preparación y movilización general del PSOE*”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006.

¹⁶² AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Preparación y movilización general del PSOE*”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 38. Entre otras finalidades del Gabinete Técnico figuraban: «1º. Realizar un seguimiento de la política en cada ministerio y de la política de conjunto del Gobierno, en los niveles técnicos; 2º. Preparar la alternativa programática que sirva al PSOE para cubrir la estrategia en relación con un posible cambio de relación de fuerzas y por tanto de ocupación del poder por los socialistas; 3º. Apoyar técnicamente las actividades del Grupo Parlamentario [...]; 4º. Asesorar técnicamente a la dirección del Partido en cuantas materias requiera ésta su colaboración» (pp. 38-39).

¹⁶³ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Preparación y movilización general del PSOE*”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 40.

¹⁶⁴ Véase sobre todo este proceso, ABDÓN, Mateos, *Historia de la UGT...*, *op.cit.*.

¿Cuáles eran los principales problemas? Partiendo nuevamente de la cada vez más imperante *lógica electoralista* “pese a los 6 millones de votos que representamos” se insistía en cómo “el Partido ha penetrado poco en el tejido social del país”. Con el riesgo añadido de que la “representación parlamentaria y la actividad legislativa” incrementará aún más la distancia entre dirección y lavase. Tocaba, por tanto, “explicar y defender la lucha parlamentaria del Partido”. Y que mejor ocasión que “defender y explicar la Constitución”. En esta tarea, en todo caso, pesaban “los hábitos de la clandestinidad”. Pero no sólo, pues en poco o nada contribuían los “estériles enfrentamientos internos, con frecuencia por motivos personales, que las tareas auténticamente socialistas”¹⁶⁵.

Acercar la militancia a las directrices del Partido, y ligar “estrechamente al Partido con la sociedad en que vivimos” pasaban a ser el único camino para “no [...] defraudar esa esperanza” depositada en la sociedad en el mismo PSOE. Y se avisaba: “[s]alvo si queremos asumir el riesgo de convertirnos en un grupo de iluminados, o en un partido carcomido por querellas internas, y no en la fuerza política capaz de integrar a nuestros conciudadanos en una lucha concreta por una sociedad más justa y más libre”¹⁶⁶. En definitiva, exaltación de la *honestidad* de la militancia socialista como base para crecer electoralmente.

Los acontecimientos que sucederían en los siguientes meses desmintieron los análisis *triumfalistas* de los propios socialistas. En cambio, y como mostraría la dirigencia socialista con absoluta maestría, tras el fracaso electoral del año siguiente, la lección quedaba aprendida: el reforzamiento de la disciplina, de la unidad y de la lealtad de la organización, junto con el control de cualquier posible deriva ideológica y programática, pasaban a convertirse en las necesarias e imprescindibles condiciones para el acceso al poder político. La gran perjudicada sería la democracia interna, tema que no casualmente cerraba el *informe de gestión*. “La debilidad y el abandonismo no deben confundir con la democracia interna y esta no debe ser incompatible con una gran disciplina en la actuación de todo el Partido”.

Por último, no eran pocos los enemigos declarados o no del socialismo. “Son muchos los intereses que se concitan contra nosotros, los socialistas, para que perdamos tiempo y energías en luchas intestinas estériles”. Lo que se resumía en como “[n]uestra democracia –no alcanzada por ningún grupo– está perfectamente garantizada en el control que sobre la Ejecutiva ejerce el Comité Federal”. Así pues, “[d]ebemos tener una gran vigilancia sobre las provocaciones y las infiltraciones, sin por ello dejar de mantener al Partido como un partido abierto, democrático y en permanente revisión crítica”. Concluyendo tras las tareas a realizar, “[e]sto no nos permite ni descansos ni debilidades”¹⁶⁷.

4.2.2.2. La irrevocable necesidad de *descargarse de la sobrecarga ideológica*: las lecciones de 1979¹⁶⁸

¹⁶⁵ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Preparación y movilización general del PSOE*”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, pp. 40-41.

¹⁶⁶ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Preparación y movilización general del PSOE*”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 42.

¹⁶⁷ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal: *Preparación y movilización general del PSOE*”, Madrid, 15 de octubre de 1978, sig. 002264-006, p. 45.

¹⁶⁸ Recogemos así la opinión de Joaquín Almunia en referencia al debate sobre el marxismo en el XXVIII Congreso socialista, en declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, pp. 321-322. Una idea que se encuentra presente en no otros pocos dirigentes socialistas. Entre otros muchos Nicolás Redondo ha expresado lo siguiente: «Nosotros teníamos unas referencias políticas e ideológicas basadas en nuestros maestros, pero no simplemente por nostalgia, sino por convencimiento político e ideológico. Sin embargo, estimábamos que tanto el PSOE como la propia UGT tenían que ir

El ascenso del socialismo se vería frenado por los resultados de las elecciones del 1 de marzo de 1979. A pesar de que no faltaron llamadas a evitar cualquier tipo de triunfalismo, el mismo estuvo más que presente durante no pocos meses entre las filas socialistas. Es probable que se *pecara* de optimista. Incluso viendo como habían transcurrido las elecciones de dos años antes y la situación del PSOE a principios del setenta y nueve, a buen seguro el desmedido *entusiasmo* llegaría a nublar los juicios más serenos. Ahí estaban las encuestas que vaticinaban un posible triunfo socialista. La crisis económica del país y concretamente el desgaste del Gobierno presidido por Adolfo Suárez quien se había enfrentando, y no siempre con los éxitos esperados, a no fáciles disyuntivas políticas, tampoco aventuraban resultados positivos para la UCD. A fin de cuentas, el Partido había madurado, la maquinaria electoral había sido engrasada y más allá de lo que se aprobaba y se decía en los órganos de dirección, la *lógica electoralista* primaba sobre otros aspectos, digamos, más políticos, más “banales” si se prefiere.

Si 1977 fue el año de la sorpresa, de lo inesperado, las elecciones de 1979 fueron las de la decepción parcial, las de la incapacidad socialista de alcanzar el poder político en el menor tiempo posible. Sus resultados *supieron* a poco entre los socialistas, y ello que para aquellas alturas, y más allá de lo comentado, se había alcanzado la “unidad socialista”, se contaba con un trabajo de fondo en el Congreso y se había sido copartícipe –en mayor o menor grado, según los casos– de los grandes pactos fundacionales de la “nueva democracia”. No era poco. Por ello los 5.469.813 votos obtenidos, los 121 diputados y los 71 senadores se quedaron cortos en el marco de aspiraciones de la ejecutiva socialista. Apenas cien mil votos más –ni siquiera una sexta parte de los votos que se habían podido arrancar con la llegada del PSP– tres diputados nuevos, y eso sí veintitrés senadores más, eran un no buen resultado para un partido que había aventurado que el 2 de marzo de 1979 podía estar en la Moncloa.

A todo lo anterior se sumaba que su ahora principal competidor, la UCD de Suárez, había salido bastante bien parado del desgaste de las tareas del gobierno en tiempos de “mudanza institucional”. A pesar de unos miles de votos menos obtenía dos escaños más –en total, 168–. Lo que venía a constituirse en la muestra más evidente de que la ciudadanía había encontrado en la Unión de Centro Democrático el actor clave para dirigir la operación de la transición a la democracia, en donde aún quedaban importantes etapas por superar. Por otro lado, los comunistas mejoraban su posición: alcanzaban cerca de los dos millones de electores, cifra que tan sólo Julio Anguita al frente de Izquierda Unida en 1996 conseguiría prácticamente repetir. Ahí estaban los 23 diputados del PCE/PSUC, que vendrían a sumarse a los *dignos* resultados en las elecciones municipales de abril de aquel año¹⁶⁹. En resumen: por delante quedaban otros cuatro años de oposición parlamentaria y de sin sabores alternados entre el mal llevado “consenso” y la oposición dura, descarnada y sin tapujos que, con el paso de los meses, mostraría la nueva *faz* de la llamada “alternativa socialista”.

Eso sí, pasado el tiempo no han faltado, en todo caso, análisis más optimistas cuando no voluntariosos:

«Entendíamos que el triunfo electoral del PSOE no era posible –y tal vez tampoco deseable por prematuro–, pero que se podía aprovechar una nueva presentación pública para

superando una fuerte sobrecarga de tipo ideológico. Era necesario drenar toda esa sobrecarga para adecuarnos a una situación y a un contexto que evidentemente estaba cambiando». Declaraciones en, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, *op.cit.*, p. 89.

¹⁶⁹ El resto de los partidos políticos con representación parlamentaria serían: Convergencia Democrática –coalición de AP de Fraga y de Acción Ciudadana Liberal de José María Arelza y Alfonso Osorio, entre otros partidos derechistas menores– 10 escaños, 1.088.578 votos; Convergència i Unió, 8 escaños, 483.353 votos; Unión Nacional cuya candidatura estaría encabezada por Blas Piñar, 1 escaño, 378.964 votos; Partido Socialista de Andalucía, 5 escaños, 325.842 votos; Partido Nacionalista Vasco, 7 escaños, 296.597 votos; Herri Batasuna, 3 escaños, 172.110 votos; ERC, 1 escaño, 123.452 votos; Euskadiko Ezkerra, 1 escaño, 85.677 votos; Unión del Pueblo Canario, 1 escaño, 58.953 votos; y, Partido Aragonés Regionalista, 1 escaño, 38.042 votos.

fragar en la conciencia colectiva que existía un partido, nuevo para muchos, pero viejo para los que vivieron la República, que estaba preparado para el relevo»¹⁷⁰.

Quien esto afirma es Alfonso Guerra director y máximo responsable de la campaña electoral de 1979, al igual que había sucedido en 1977 y sucedería en otras tantas ocasiones hasta la década de los noventa. “Los resultados electorales no fueron malos para el PSOE, pero muchos lo vivieron como un fracaso, pues había llegado a creer en el triunfo”. Y añadía: “en la noche electoral, en la sede del Partido, los militantes se sentían derrotados, desconsolados”¹⁷¹.

Mucho se ha especulado sobre qué pasó realmente: por qué sí las encuestas marcaban una dirección favorable al PSOE, finalmente las mismas no se materializaron¹⁷². De forma insistente y habitual se ha tendido a dar una importancia –probablemente– desmesurada a la intervención del candidato Adolfo Suárez en TVE clamando contra una posible llegada del “apocalipsis rojo” como bien recuerda de nuevo Guerra: “pues en el programa electoral en televisión, en el último día de campaña, empleó toda la vieja artillería franquista contra el PSOE [...]. Era el freno a las «hordas marxistas». Su diatriba fue eficaz”¹⁷³. Sin duda aquella intervención influyó. En gran medida las palabras del *piloto de la transición* –como bien gusta señalar a sus hagiógrafos¹⁷⁴– tenían una enorme influencia entre la sociedad.

Superados los momentos más complicados y duros –en donde incluso el propio Felipe González caería en el desanimo generalizado¹⁷⁵– pronto vinieron análisis más concienzudos y elaborados por parte de los intelectuales y los cuadros socialistas¹⁷⁶. El primer bloque de conclusiones fueron acertadas aunque limitadas en sus propios planteamientos. Así el *varapalo electoral* de 1979 mostraba, al menos, tres realidades incontestables por aquellas alturas: a) el

¹⁷⁰ GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, op.cit., p. 310.

¹⁷¹ Ibídem, p. 312.

¹⁷² Sobre el contexto y la dinámica electoral de aquella contienda remitimos a, ESTEBAN, Jorge de y LÓPEZ GUERRA, Luis (eds.), *Las elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1979; BONACHELA MESAS, Manuel [et al.], *El comportamiento electoral...*, op.cit.; GÜNTHER, Richard, *The dynamics of electoral competition in a modern society: models of spanish voting behavior, 1979 and 1982*, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1991. Y concretamente: ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE, *España a las urnas*, Madrid, Asociación Independiente, 1979, estudio completísimo sobre dicho proceso electoral. Por lo demás, dos balances periodísticos que merecen ser tenidos en cuenta en, RAMÍREZ, Pedro J., *Así se ganaron las elecciones*, Barcelona, Planeta, 1977; id., *Así se ganaron las elecciones de 1979*, Madrid, Prensa Española, 1979.

¹⁷³ GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, op.cit., p. 312. Véase asimismo el interesante trabajo de, QUINTANA PAZ, Nuria, *Televisión y prensa durante la UCD: premios y castigos mediático-gubernamentales*, Madrid, Fragua, 2007.

¹⁷⁴ En primer lugar, consúltese la visión *no amable* (y casi única) de, MORÁN, Gregorio, *Adolfo Suárez: historia de una ambición*, Barcelona, Planeta, 1979 [años más tarde reeditada a la par que revisada en, id., *Adolfo Suárez: Ambición y Destino*, Barcelona, Debate, 2009] Por otro lado, la mayor parte de las aproximaciones a su figura han tendido un objetivo laudatorio de su trayectoria. Entre otros ejemplos, GARCÍA ABAD, José, *Adolfo Suárez: una tragedia griega*, Madrid, La Esfera de los Libros, ABELLA, Carlos, *Adolfo Suárez*, Madrid, ABC, 2005; o QUEVEDO, Francisco, *Pasión por la libertad: el pensamiento político de Adolfo Suárez*, Barcelona, Altera, 2007. Acercamientos, la mayor parte, de encargo realizados por periodistas que hasta el momento nada nuevo ni relevante han aportado.

¹⁷⁵ El retrato planteado por Santos Juliá es lo suficientemente explícito: «Un Felipe González con la moral insólitamente perdida habría manifestado en la primera reunión de su grupo parlamentario: ‘compañeros: El PSOE ha tocado techo; nunca podrá ganar las elecciones a UCD’». JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, op.cit., p. 527.

¹⁷⁶ Entre otros, TEZANOS, José Félix, “Análisis sociológico del voto socialista en las elecciones de 1979”, *Sistema*, nº 31, (1979), pp. 105-122; id., “El espacio político...”, op.cit.; y, LEGUINA, Joaquín, MUÑIZ, Miguel y SOLANA, Javier, “Un análisis socialista de las elecciones”, *Zona Abierta*, nº 19, (1979) pp. 5-11. A destacar el elaborado y concienzudo trabajo analítico en clave histórica de, MARAVALL, José M^a, “La alternativa socialista...”, op.cit..

amplio espectro electoral que conservaba un centro-derecha encabezado por UCD, junto al miedo y el recuerdo del pasado reciente¹⁷⁷. No faltan ejemplos en prensa y en otros medios escritos de lo anterior¹⁷⁸. Todo lo cual se resumía en la amplia confianza ciudadana depositada en torno a Suárez más que en las siglas de UCD o sus gobiernos¹⁷⁹.

En segundo término, y como reconocieron los socialistas tanto para las elecciones de 1977 como de 1979, en caso de haberlas ganado la situación política dada hubiera sido difícil de gestionar. Pues tanto los poderes fácticos a nivel político y a nivel militar –sin olvidar a la jerarquía de la iglesia católica– difícilmente habrían permitido un gobierno socialista¹⁸⁰. Hipótesis no descartable teniendo en cuenta el marco de inestabilidad política en pleno cambio de régimen político, a lo que se sumaba el clima de inseguridad ciudadana provocada por el terrorismo tanto de la ETA como de la extrema derecha, y el riesgo más que evidente, según avanzaba el tiempo, de planes, más o menos elaborados, de golpes de Estado¹⁸¹. Circunstancias

¹⁷⁷ Recordaba José Félix Tezanos al albur de una encuesta post-electoral de 1979 que el «17,5 por 100 de los encuestados que no votaron al PSOE en las elecciones legislativas del 1 de marzo, declararon que ‘el algún momento antes del día de las elecciones tuvieron intención de votar por el PSOE’. Y, de manera más concreta aún, entre los encuestados que no votaron, nada menos que un 24,2 por 100 manifestaron que en algún momento tuvieron intención de votar por el PSOE. Es decir, de haberse materializado tales intenciones originales el PSOE hubiera obtenido, sin duda alguna, mayoría de votos en las elecciones legislativas de 1979, tal como llegaron a pronosticar algunos sondeos electorales». Más adelante se preguntaba sobre las causas que motivaron a los potenciales electorales para no declinar finalmente su voto en la candidatura del PSOE: 8,8% *Por no confiar en la competencia técnica del PSOE*; 8,8%, *Porque en el programa del PSOE había puntos que chocaban con sus ideas religiosas*; 4,8% *Por considerar al PSOE poco preocupado por las cuestiones regionales*; 4,7% *Por miedo a lo que pudiera pasar*; 4,1% *Por temor a un gobierno de coalición*; 2,7% *Por el carácter marxista del PSOE*; 2,3% *Porque el PSOE no defiende suficientemente a los trabajadores*; 1,6% *Porque el PSOE no es marxista*. TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, op.cit., pp. 78-79 y 83, respectivamente.

¹⁷⁸ CAMBRA, Pilar, *Socialismo no es...*, op.cit., quien afirmaría en la propia introducción: «El socialismo que propone el PSOE no es libertad es, sencillamente, imposible. O matizando, no ha sido nunca posible. Y en las contadas ocasiones en que se planteó esta posibilidad, el resultado ha sido Chile: desmoronamiento del país e ‘irresistible ascensión’ de la alternativa ‘salvadora’ de signo fascista en forma de bombardeo de la Casa de la Moneda».

¹⁷⁹ Sobre la UCD existe una bibliografía exigua en relación a su protagonismo histórico en la España del tiempo presente. Ahora bien, sobre estos episodios no deje de verse: ALONSO-CASTRILLO, Silvia, *La apuesta del centro: historia de la UCD*, Madrid, Alianza, 1996; HOPKIN, Jonathan, *El partido de la transición: Ascenso y caída*, Madrid, Acento, 2000. Y concretamente el trabajo, prácticamente no superado, de: HUNEEUS, Carlos, *La Unión de Centro Democrático y la transición democrática española*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1985.

¹⁸⁰ Por ejemplo, y para el caso de marzo de 1977, durante aquellas *elecciones fundacionales* en palabras de Charles Powell se extendió la idea, incluso entre los dirigentes del PSOE, de que «ante un posible triunfo socialista» el mismo «provocase una intervención militar que pusiese fin al proceso democratizador». POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., pp. 193-194.

¹⁸¹ «Las cifras resultan elocuentes. En el periodo indicado [años 1975-1982] 665 personas perdieron la vida como consecuencia de la violencia política. De estas 665 muertes, 162, (24%) corresponden a la actividad represiva del Estado. El resto, 503 muertes, es, en su mayor parte, violencia terrorista». SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio, «La violencia terrorista en la transición española a la democracia» en AVILÉS, Juan (ed.), *Terrorismo en la España democrática*. Dossier monográfico *Historia del Presente*, nº 14, (2009), p. 9. Véase en ese mismo trabajo, «Tabla 1. Muertos causados por los grupos terroristas en la Transición» (p. 11). Texto que forma parte de un proyecto de investigación del autor junto con Paloma Aguilar [consúltase al respecto, SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio y AGUILAR, Paloma, «Terrorist Violence and Popular Mobilization: The Case of the Spanish Transition to Democracy», *Politics & Society*, vol. XXXVII, nº 3, (2009), pp. 428-453] y que tiene como punto de partida la base de datos: «Explaining Terrorist Target Selection» [www.march.es/ceacs/proyectos/dtv/datasets.asp]. Igualmente consúltase el estudio del periodista,

que tampoco favorecieron, lógicamente, a la opción electoral socialista. Un tercer factor debería situarse en la siguiente perspectiva de análisis: el programa del PSOE sin ser radical lejos estaba de poder ser aceptado por las clases dominantes. En esta situación también pesaba la situación de crisis económica, todavía más grave tras la llegada de la *segunda crisis del petróleo* de 1979 que afectaría duramente a España, y que tuvo su mayor reflejo en el importante incremento del paro y la inflación, lo que junto con el retorno de la emigración, empeoró de forma sustancial una situación de por sí delicada.

A pesar de todo lo dicho hasta aquí, al PSOE –en modo alguno– se le pudo achacar posiciones radicales o desmesuradas, tanto en el desarrollo de la campaña como en lo que se refiere al programa electoral. Otra cuestión es lo que sucedería a nivel interno dentro del PSOE en el ajetreado año setenta y nueve, en donde, al parecer, el haberse declarado marxista era el principio y final de todos los “desastres socialistas”. Realidad, ideología y encuestas/resultados transitaban por caminos ampliamente separados.

Desde entonces, en aquel contexto electoral el socialismo español moderaría aún más su posición política de partida, rebajaría sus principales puntos de oferta electoral, y presentaría, en suma, un programa de *gobierno maduro*, bajo la egida de la responsabilidad con el país, la historia y su compromiso con el pueblo. El PSOE, según su propio autoanálisis, venía a ser el partido de la democracia, de la seguridad y de la estabilidad¹⁸². Ni siquiera en su eslogan electoral principal aparecía ya la palabra socialismo: “Tu voto es nuestra fuerza”. Inclusive el segundo eslogan elegido podía firmarlo cualquier partido político, de derecha a izquierda, sin menores inconvenientes: “Un Gobierno firme para un país seguro”. Por no recordar el otro famoso lema socialista de aquel mismo año: “Cien años de honradez”, todavía presente en la memoria colectiva de las generaciones que vivieron aquellos acontecimientos.

Aquella apuesta no era casual, pues respondía a las *fuerzas* cada vez más mayoritarias que comenzaban a moverse dentro del socialismo, y que una vez conocidos los resultados explotarían en su seno. ¿Qué decía el programa electoral?¹⁸³ En lo básico: poco más que el de dos años antes con algún que otro matiz menor más de forma que de contenido. En cambio, la presentación e imagen que venía a ofrecer estaban en consonancia con la madurez con la que se quería presentar el futuro programa del Gobierno. Acompañándole de la promoción de un *nuevo* maduro líder, Felipe González. Muy lejos, en este caso, del carácter más “ligero” y “joven” del setenta y siete.

“El PSOE cumplió los compromisos adquiridos con sus electores, dando la batalla parlamentaria en todas las comisiones, porque es un partido serio y coherente”, se afirmaba en la *introducción* del programa electoral en lo que parecía más la *entradilla* a un informe de la CEF que a un programa electoral¹⁸⁴. A tenor de lo allí dicho –por ejemplo, “[e]l objetivo básico

SÁNCHEZ SOLER, Mariano, *La transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983)*, Barcelona, Península, 2010. Véase también lo apuntado en la *nota* 258.

¹⁸² La campaña electoral para los socialistas tuvo ya una orientación y una estrategia diferente ante un triunfo que se adivinaba posible. El PSOE llevaría a cabo un gran esfuerzo en presentarse como el partido de la democracia, la seguridad y la estabilidad. Alfonso Guerra como responsable de aquella campaña electoral ha indicado sobre la nueva imagen que se quería representar lo siguiente: «Así la campaña gráfica dio un vuelco toral. De los grandes carteles alegres, llenos de color, con el líder en camisetas deportivas, pasamos a un diseño de blanco y negro, con Felipe González de trabajo y corbata, y unos lemas que proporcionasen seguridad y solidez. Si en las elecciones de 1977 simbólicamente hicimos una campaña amante, entonces ofrecimos una campaña marido [...] en las segundas queríamos convencer a los electores de que los jóvenes demócratas podían garantizar estabilidad, orden y administración en la gobernación del país». GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, *op.cit.*, pp. 246-247.

¹⁸³ PSOE, *Programa Elecciones 79*, Madrid, 1979. Se emplea aquí la versión facsímil del programa electoral. Igualmente consúltese: AHFPI, PSOE, Comité Electoral Federal, “Guía de campaña elecciones locales 79: confidencial”, Madrid, 1979, sig. Fc 767.

¹⁸⁴ PSOE, *Programa Elecciones 79...*, *op.cit.*, p. 1. Existen números informes del Grupo Parlamentario sobre su trabajo en aquel tiempo. Véase, entre otros: AHFPI, PSOE, Secretaría de

socialista [...] de las primeras Cortes democráticas fueran *constituyentes*, se ha cumplido plenamente”¹⁸⁵ – el socialismo había trabajado duro, y ahora reclamaba su protagonismo. “[E]l PSOE ha cumplido por encima, incluso, de lo que la relación de fuerzas parlamentarias existentes permitía”¹⁸⁶. Realizada la oportuna diatriba contra el PCE, en esta ocasión bastante camuflada, recordada la importancia de haber completado la “Unidad Socialista”. A su vez presentaba la política transversal realizada por los y las socialistas en el parlamento, en la calle, con el pueblo, e insistiendo en los graves problemas del país. “La libertad ya está en nuestras manos” se afirmaba, “pero el país padece graves problemas sociales económicos y políticos”¹⁸⁷.

No faltaban los responsables. “El Gobierno actual no ha cumplido los Acuerdos de la Moncloa” se resaltaba. Pero no terminaba ahí. Se criticaba su incapacidad de “ofrecer una alternativa económica clara”, se le acusaba de “falta de autoridad para resolver las tensiones en algunos sectores de las Fuerzas Armadas y de Orden Público”, de incapacidad de “detener el terrorismo” o de “abuso partidista de TVE”. En suma, “el Gobierno [...] no ha gobernado, porque carece de una ideología clara, de un programa, de un equipo cohesionado y de un líder auténtico, forjado en la democracia”¹⁸⁸. Exactamente todo lo contrario que sucedía en el PSOE, quien ya estaba “en situación y tiene capacidad para formar un Gobierno con amplio respaldo popular, que pueda afrontar con decisión los grandes problemas económicos y los retos políticos y sociales de la hora actual”¹⁸⁹.

Una vez más, la distancia entre lo expresado en los programas electorales y lo contenido en las resoluciones, informes de gestión y documentos congresuales era abismal. Igualmente se esbozaba allí un cambio de prioridades programáticas, bajo un claro eje explicativo: resaltar los problemas económicos por encima de los políticos. Aunque se hablaba de la apuesta por “la planificación” y el “reforzamiento del sector público”, las medidas en materia económica no iban más allá. Si se apura, de hecho, se podían entrever algunas concesiones más propias de las socialdemocracias ya instaladas en el gobierno que el de un partido de la oposición, cuyo objetivo era la conquista del poder político arrancando votos por la izquierda, pero también por el *flanco* del electorado centrista. A pesar de insistir en que los “objetivos permanentes de una política socialista se dirigen a asegurar a todos un bienestar suficiente que les libere de la tiranía de las necesidades”, lo que en plano emotivo constituía un aliciente para la movilización por la izquierda; mal combinaba aquello con expresiones y propuestas más propias de un cierto liberalismo disfrazado. Pues tras recordar que la “sociedad española debe hacer un duro esfuerzo colectivo” e insistir en el “[e]stablecimiento de incentivos para que la inversión privada recobre un ritmo positivo”, lo que allí se ofrecía –cuando se profundiza en su análisis– era una serie de medidas descafeinadas en la misma línea enunciada¹⁹⁰. Eso sí no faltaba la consiguiente crítica a la “política liberal seguida por el actual Gobierno” a la par que se reclamaba en un lugar secundario un “[a]umento de los impuestos directos sobre las rentas elevadas y los beneficios especulativos”¹⁹¹.

Propaganda, “PSOE 300 días en el Parlamento: 166 parlamentarios socialistas rinden cuentas ante el pueblo”, Madrid, 1979, sig. Fa 12685.

¹⁸⁵ PSOE, *Programa Elecciones 79...*, *op.cit.*, p. 1.

¹⁸⁶ *Ibídem*, p. 2.

¹⁸⁷ *Ibídem*. A saber, sin ánimo de exhaustividad: *paro ascendente, crecimiento continuado y excesivo de los precios, incremento del terrorismo y de la delincuencia, viviendas sumamente encarecidas, falta de transportes urbanos colectivos suficientes y decorosos...* *Ibídem*, pp. 2-3.

¹⁸⁸ *Ibídem*, p. 3.

¹⁸⁹ *Ibídem*.

¹⁹⁰ *Ibídem*, p. 4. Por ejemplo, entre las medidas que aquí se califican como progresistas estaban las de fomentar un *programa de inversiones públicas, reducir el pluriempleo, la formación profesional eficiente o la implantación de un seguro de desempleo*.

¹⁹¹ *Ibídem*, pp. 5-6.

No obstante, el programa socialista no renunciaba a presentar algunas “recetas clásicas” de la socialdemocracia que, a pesar de su calculado encaje, fueron habitualmente empleadas por las clases dominantes y la élite empresarial –con la CEOE en primer término¹⁹²– para denunciar el radicalismo socialista. Medidas muchas de ellas que estarían en el punto de mira de los propios socialistas a la hora de interpretar los resultados, asumiendo así, en gran medida, el propio análisis y denuncia de la derecha política, económica y cultural. ¿En qué consistían aquellos radicalizados “residuos” del programa del PSOE? En concreto, en plantear un “área nacionalizada de propiedad estatal que estaría formada por el crédito oficial”, sumada a un “área socializada formada por las cajas de ahorro”, que sin cuestionar la propiedad privada, permitiera el saneamiento del sistema financiero, estableciendo de paso una regulación hasta entonces prácticamente inexistente¹⁹³. Con el programa hacendístico sucedía otro tanto: “culminación del desarrollo normativo”, “[e]laboración de los reglamentos de los principales impuestos”, “creación de agencias tributarias en los núcleos de población con más de 50.000 habitantes”. En conclusión, aquel programa resultaría bastante moderado teniendo presente que, por ejemplo, no se hablaba ni siquiera de persecución del fraude tributario. Así tan sólo se planteaba directamente nacionalizar la “red de transporte de energía eléctrica de alta tensión”¹⁹⁴. Las anteriores propuestas pueden leerse desde varios puntos y enfoques: electorales, políticos, oportunistas, estratégicos... Aunque no se decía explícitamente quedaba muy claro por aquellas alturas que si el “miedo político” había sido la constante dos años antes, el “miedo económico” era entonces la tónica dominante¹⁹⁵.

En el plano de lo político, el tema de las libertades políticas pasaba a un segundo plano, asumiendo un protagonismo singular la “seguridad ciudadana” amenazada por el terrorismo y concretamente por la “delincuencia”, cuya solución, “ha de sustentarse en una reestructuración y racionalización de las Fuerzas de Orden Público y en la toma de las medidas necesarias a nivel político y policial”¹⁹⁶. Más allá de tratar de “conseguir la reeducación del delincuente”, por aquí precisamente, poco o ninguna, diferenciación política podía localizarse en el programa socialista de sus otros competidores por la derecha o la extrema derecha. También cuando se resaltaba como uno de los primeros puntos la apuesta por un “conveniente desarrollo de las autonomías, defendiendo la unidad de España”¹⁹⁷. Tampoco quedaba ya rastro o alegato alguno al valor de las siglas socialistas con el pasado reciente del país. De esta forma, aquel mismo programa en donde el PSOE se auto-percibía con la “autoridad moral” suficiente para resolver los anteriores problemas, podía firmarlo cualquier partido político que no fuera estrictamente de “izquierdas”.

Con todo el programa socialista sí contenía algunos aspectos de avance o como ellos mismos calificaban de “progresistas”. Por ejemplo, a la hora de tratar un aspecto tan esencial como el desarrollo de la Constitución. Aunque vinculaban un “desarrollo progresista de la Constitución” con una “victoria electoral de los socialistas” como única vía posible, se establecían algunas medidas que irían tomando fuerza y consistencia en los meses siguientes¹⁹⁸.

¹⁹² Véase aquí el estudio de, DÍAZ-VARELA, Mar y GUINDAL, Mariano, *A la sombra del...*, *op.cit.*.

¹⁹³ *Ibídem*, p. 6.

¹⁹⁴ *Ibídem*, p. 9.

¹⁹⁵ A todo lo anterior, se sumaba en un tercer y último apartado un epígrafe titulado: “Bienestar social” en donde se hacía mención, entre otras cuestiones, a las propuestas socialistas en materia de *salud, seguridad social, jubilación, educación o juventud*.

¹⁹⁶ *Ibídem*, p. 11. Con respecto a este último tema se añadía un pequeño matiz: el mismo «no puede desvincularse de nuestros planes económicos y sociales destinados a la lucha contra el paro y a la defensa de la juventud, al igual que a nuestro tratamiento del sistema penitenciario para que éste no se convierta en escuela de delincuentes». *Ibídem*, p. 12.

¹⁹⁷ *Ibídem*, p. 11.

¹⁹⁸ *Ibídem*, p. 12.

A saber, las “[l]eyes sobre derechos de los trabajadores”, “[l]eyes para la participación popular” o “[l]ey de Régimen Local”. Demandas clásicas procedentes del movimiento obrero, la sociedad civil, los nuevos movimientos sociales, y que una vez tramitadas en las Cortes el PSOE no dudaría en pactar con la derecha, posibilitando no pocos recortes sustanciales en algunos aspectos básicos. Otro tanto sucedía en cuestiones como el “proceso autonómico” o la “reforma de la administración”¹⁹⁹. Ninguna *huella* de viejas consignas.

En todo caso, como novedad más relevante, antes por el lugar ocupado que por su contenido, era la introducción en aquella parte del programa de un amplio apartado sobre la *necesaria* democratización de las relaciones laborales. Aunque superpuesto con otros epígrafes, el PSOE recogía un conjunto de propuestas mínimas que configuraban las banderas reivindicativas históricas de la UGT en sus aspectos más esenciales: *derecho de sindicación, derecho de huelga, negociación colectiva, acción sindical en la empresa* –con el reconocimiento cerrado de las “secciones sindicales de empresa”– o la aprobación de una futura Ley del Estatuto de los Trabajadores²⁰⁰. La búsqueda del voto obrero era el cometido de aquel apartado.

Por último, y tras plantear una política de modernización de las Fuerzas Armadas como propuesta original del programa, se defendía una política exterior tan amplia como tan ambigua, en donde prácticamente cabía cualquier interpretación. Se dejaba, asimismo, claro que los socialistas lucharían por “evitar la satelización de España”, y a la par adoptarían una “postura firme en defensa de los derechos humanos en todo el mundo y de la solidaridad entre los pueblos”. No sólo, pues trabajarían por “paz y la solución pacífica de los conflictivos internacionales”. Tras descartar que los “socialistas no permitiremos una política al servicio de grupos económicos” se solicitaba “la negociación de un tratado de adhesión a la CEE”. Y puestos en *faena* se reclamaba la “plena soberanía de España sobre Gibraltar”. Finalmente, se concluía afirmando como el “PSOE se opone a la vinculación de España a ninguno de los bloques militares”. Un programa, en suma, en el que no quedaba rastro de petición de *referéndum* o de cualquier otra medida sobre la entrada o no en la OTAN, lo que ayudaba, a la postre, a evitar complicaciones inesperadas.

«Alfonso [Guerra], el Partido no puede seguir definiéndose como marxista, así no llegaremos a ninguna parte. Además, no hay que preocuparse no habrá ningún problema».

Extracto de una conversación entre Felipe González y Alfonso Guerra en mayo de 1978²⁰¹.

Pasados varios días de aquel primero de marzo del setenta y nueve, la dirección del PSOE llevó a cabo una lectura que, en breve, devendría en central: las que habían sido sus señas de identidad jugaban en su contra en la nueva coyuntura política. Un inicial balance, en donde había quedado meridianamente claro que la sociedad española no aceptaba posiciones ideológicas radicalizadas ni planteamientos ambiguos con respecto a los aspectos claves de los que dependía el futuro del país. Y ello, a pesar del programa electoral antes examinado. Todavía más. La paradójica posición mantenida por el PSOE hasta ese momento conllevó aparejada numerosas acusaciones por parte de la derecha política, que evidenciaban las propias contradicciones del socialismo, entre su ideología radical en el plano de lo teórico y la práctica política de ser copartícipe en la construcción del nuevo régimen democrático. Contradicciones

¹⁹⁹ *Ibídem*, pp. 12 y 13, respectivamente.

²⁰⁰ *Ibídem*, pp. 14-15.

²⁰¹ GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, *op.cit.*, p. 327.

aparte, lo cierto es que en aquella “ambigüedad de fondo” había residido tanto su éxito político como electoral²⁰².

Las dobles posiciones –ideológicas y políticas– tocaban a su fin. Por consiguiente se hacía evidente la necesidad de transformar la organización entera, como se reconocería en las tesis políticas del congreso clave de la historia reciente del socialismo español:

«De organización de resistencia contra el régimen franquista, el PSOE ha pasado a ser un pilar fundamental del nuevo Estado democrático y, en esta transformación su crecimiento ha sido espectacular, lo que ha puesto en prueba la capacidad funcional y de encuadramiento de la organización»²⁰³.

Se imponía, pues, cambiar el rumbo estratégico. Si bien se había demostrado que las tesis del PSOE histórico no eran del todo descabelladas, como evidenció la capacidad de atracción del voto del partido socialista, en buena medida, por el valor y el significado de sus siglas en la memoria colectiva viva y transmitida del país²⁰⁴; por otro lado, aquel planteamiento tenía sus limitaciones.

El socialismo “real” antifranquista también de frugal y débil existencia se daba por concluido. Ya se justificaría, en adelante, su papel en el fin político de la dictadura²⁰⁵. En cualquier caso, aquello siempre fue un asunto menor. Engrasar la maquinaria electoral se convertía en la única prioridad a efectos prácticos.

A grandes rasgos existen dos tipos de congresos en las organizaciones políticas de la izquierda política en España: a) los de *continuidad y reafirmación* de las líneas política; y b) los de *catarsis colectiva y organizativa*. El XXIX Congreso socialista en 1981 es la fiel demostración del primero de los tipos; mientras que los dos XXVIII Congresos socialistas del año 1979 han de ubicarse en el segundo tipo. Así 1979 se constituye en una *fecha frontera* para el PSOE, pues allí se decidió no sólo transformar el socialismo español sino que, en la práctica, se (re)fundó una nueva organización.

²⁰² JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 523.

²⁰³ AHFFLC, PSOE, “59 Tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE”, Madrid, julio de 1979, sig. 185-21, p. 21. Igualmente véase como quedaron redactadas aquellas mismas *Tesis* tras el Congreso extraordinario: AHFPI, PSOE, “Resolución política del Congreso Extraordinario. Madrid, 28 y 29 de septiembre 1979”, Madrid, 1979, sig. Fc 261. En la elaboración original del documento intervendrían José María Maravall, Joaquín Almunia, Joaquín Leguina, Joaquín Arango y Javier Solana, y siendo redactado en el mes de agosto de aquel año por Miguel Satrustegui y Álvaro Espina. Datos procedentes de, MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, *op.cit.*, p. 83.

²⁰⁴ «En consecuencia la acción del partido no puede estar volcada hacia su interior, más allá de lo mínimo necesario para dotarse de una estructura que lo haga eficaz en su misión transformadora de la sociedad». AHFFLC, PSOE, “59 Tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE”, Madrid, julio de 1979, sig. 185-21, p. 21.

²⁰⁵ «Ante la salida de la dictadura, el Partido realizó un análisis de la realidad de la sociedad española y de la relación de fuerzas que le llevó a la constatación de que el camino hacia la democracia – la ruptura democrática– no podía concebirse sino como un proceso dialéctico en el que la actuación de fuerzas democráticas debía orientarse a la conquista progresiva de parcelas de libertad, de tal forma que cada conquista fuera irreversible y permitiera a la vez nuevos avances. Para ello el instrumento básico era la combinación de los elementos de presión con los de negociación, que se alimentaban mutuamente: la negociación podía avanzar en la dirección deseada en la medida en que existía una presión, y ésta sería para garantizar la continuidad y la orientación de la negociación». Asimismo se señalaba que la conquista de parcelas de poder se basó en «poner en práctica una estrategia de acceso progresivo a instancias de poder institucional, con un doble fin: a) presentar ante los ciudadanos un modelo de gestión pública que reforzase la credibilidad de nuestra opción como alternativa de Gobierno, y b) situar al propio Partido en condiciones de ejercer eficazmente ese tipo de responsabilidades». AHFPI, PSOE-CE, Comisión Organizadora del XXX Congreso, “Memoria de Gestión 1981-1984. 30º Congreso”, Madrid, diciembre 1984, sig. Fc 279, pp. 7-8. Véase lo apuntado en la *nota* 78.

Las declaraciones y movimientos tácticos en los meses previos al primero de los congresos citados, mostraron que el futuro encuentro socialista iba a ser “movido”. Entre los movimientos dentro de la organización, destacaron aquellos en forma de documentos de carácter interno o públicos. Entre otros muchos es significativo por su contenido y por quienes firmaron el mismo –Baltasar Aymerich, Enrique Barón, José Borrell, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, José Ignacio García Blanco y Luis Velasco– el titulado “Condicionamientos y líneas básicas del programa del PSOE”. Y decimos que es ilustrativo ya que refleja todas las contradicciones y aspiraciones del socialismo, a la hora de apostar por una nueva estrategia económica. ¿Qué decía aquel documento firmado por importantes militantes socialistas? De entrada, y tras constatar que “parece más oportuno y favorable para nuestros intereses el acceso al gobierno en la primera mitad del próximo año”, a saber en 1980, se mantenía que el principal eje de actuación sería “la política económica [...] en torno a los Acuerdos de la Moncloa”. Además existía allí una preocupación varias veces advertida: “fijar unos aspectos claramente diferenciadores de su alternativa en materia económica que permita clarificar posturas y establecer fronteras políticas evidentes”. Realizadas las consignas de *turno* sobre la necesidad de “una recomposición del modelo de producción y acumulación”, y constatada la grave situación por la que atravesaba la economía del país, se expresaban varios de los miedos e incertidumbres que rodeaban a la estrategia partidista en aquel momento. El primero de ellos, “que las reformas contenidas en el Pacto de la Moncloa no se lleven a cabo y que el espíritu de reestructuraciones sectoriales desaparezca”; segundo, en caso de una “hegemonía socialista sería más factible la consolidación de un gran partido de la derecha vía unión AP-UCD”, lo que conllevaría “cierto «terrorismo económico»”. Después de advertir de la “la absoluta inviabilidad a corto plazo del bipartidismo”, y de la posible “potenciación del PCE” en la coyuntura descrita, venía lo que sin duda *atormentaba* a una parte no minoritaria de la élite dirigente socialista: la apuesta por la diferenciación programática del socialismo sin caer en radicalismos, lo que se concretaba en la necesidad de ampliar el “contenido progresista” de las propuestas. A saber, “[e]s necesario clarificar aspectos tan esenciales como, p.e., la política de nacionalizaciones; hay que eliminar ambigüedades como la de la fase de consolidación y la de transición al socialismo”²⁰⁶. Y aquí llegaba lo importante: “[L]os empresarios deben saber que si los socialistas llegan al poder tomarán tales y tales medidas en este campo”. Como se insistía más adelante, y una vez presentadas las *principales líneas del programa* ya adelgazadas de contenidos radicales, se evidenciaba otra de las inquietudes estratégicas: un posible enfrentamiento con la “clase dominante del país”. Así pues, resultaba imprescindible para los redactores de aquel documento, clarificar, primero, la política de alianzas, para a continuación “incluir en nuestra opción política de gobierno a los representantes de un conjunto de intereses económicos que significan un apoyo progresista muy válido para consolidar la democracia (p.e.,

²⁰⁶ En torno a una futura política de nacionalizaciones siempre se mantuvo dentro del grupo de economistas, y concretamente por parte de Felipe González, una enorme prudencia. No faltan los ejemplos como en el caso de la ya citada reunión del Grupo Federal de Economistas del PSOE en Madrid los días 11 y 12 de marzo de 1978, es decir, un año antes de las siguientes elecciones generales. En el resumen que proporciona Carlos Solchaga de aquella reunión se destaca como tras presentar Miguel Boyer –representante del *ala moderada* socialista– una ponencia titulada “Empresa Pública y Nacionalizaciones”, el propio Felipe González advertiría: «hizo notar en el debate sobre nacionalizaciones la necesidad de que éste fuera un debate interno sin repercusiones en los medios de comunicación que pudieran deformar las opiniones del P.S.O.E y alertar a la derecha. En general, y en una primera fase, la mayoría se inclinaba por una política de cautela en el tema de las nacionalizaciones. La reestructuración de sectores como consecuencia de la crisis industrial y su posible nacionalización total o parcial fue un tema que salió una y otra vez en las conversaciones». Tras lo cual el propio Solchaga señalaba: «Mi impresión es que la mayoría se inclinaba por exigir la nacionalización si la financiación de las reestructuraciones suponía un nivel de deuda que no fuera previsible que el sector pudiera amortizar en un plazo razonable de tiempo». AHFFLC, Fondo Saracíbar, Carlos Solchaga, “Informe sobre la reunión del Grupo Federal de Economistas del PSOE, Madrid, 11 y 12 de marzo de 1978”, Bilbao, 22 de marzo de 1978, sig. 002265-005, pp. 3-4, respectivamente.

pequeños y medianos empresarios, agrícolas e industriales, etc.)”²⁰⁷. En resumen, buena parte de las *matizaciones* que allí aparecían reflejadas de cara a elaborar el futuro programa socialista de gobierno se constituirían, en suma, en algunos de los elementos de debate y de enfrentamiento durante los dos congresos del socialismo de 1979.

Por el lado de las declaraciones, el propio Felipe González sería el encargado de esbozar desde un año antes, en más de una ocasión, todas estas cuestiones acerca de cómo entender el socialismo y cómo interpretarlo en el nuevo contexto internacional y nacional. Ya en mayo de 1978 en Barcelona, como escribió Antonio García Santesmases, en la estrategia de superar la imagen del marxismo como “pensamiento dogmático, estrecho, cerrado, incómodo para una amplia base del electorado” así como de cara a tranquilizar a las clases dominantes, en mucho ayudó que el propio González afirmara que “la economía de mercado tenía futuro en España para decenios y decenios”²⁰⁸. Pero no sólo pues “[s]in consultarlo con nadie, y sin que nadie «estuviera enterado de que se iba a hacer esa declaración», González —como recuerda Santos Juliá— afirmó [...] que había sido un error definir como marxista al partido socialista porque «desde el punto de vista social, el término no ha sido aceptado»”. Nació lo que en su día se conoció como la *Declaración de Barcelona*. No terminaba el asunto ahí, prosigue Juliá. Resultaba que el propio Secretario General del PSOE no había estado de acuerdo en el Congreso de 1976 de que se “incluyera ese término definitorio”. Dicho en otras palabras: aquello había sido un tremendo “error”²⁰⁹.

Igualmente la repetición de aquella propuesta por parte de González en Gijón unos días antes de la apertura del XXVIII Congreso no aventuraba nada positivo. En aquella ocasión hablaría de desprenderse de la “esquizofrenia ideológica” en la que se hallaba la organización socialista²¹⁰. Y ello que no había tenido problema alguno por aquellas mismas fechas en cantar la Internacional en un gran acto conmemorativo de los cien años de la fundación del PSOE²¹¹. Asimismo tampoco faltaron las protocolarias declaraciones de buenas intenciones sobre que el

²⁰⁷ AHFFLC, Fondo Saracíbar, PSOE, Baltasar Aymerich, Enrique Barón, José Borrell, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, José Ignacio García Blanco, Luis Velasco, “Condicionamientos y líneas básicas del programa del PSOE,” 1979?, sig. 002266-005, pp. 1-10. Y concluía el citado documento: «Nos encontramos a veces que existen contradicciones entre planteamientos económicos y políticos y/o que en las formulaciones políticas intervienen poco los planteamientos económicos. En todo caso creemos que los aspectos económicos se integran en escasa medida o ex-post en la política del Partido» (p. 10).

²⁰⁸ GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Las dos opciones..., *op.cit.*, p. 38. Se refería en concreto a las declaraciones efectuadas en mayo de 1978, consultables en Noticia, “El próximo congreso ordinario del PSOE en diciembre”, *El País*, 9 de mayo de 1978. Aquellas afirmaciones causaron un autentico revuelo dentro del PSOE al que pronto surgieron numerosas respuestas en más de un sentido —véase, *Cuadernos para el diálogo*, n° 264, (1978)—. Como recuerda el propio García Santesmases tampoco sentó bien entre la militancia el texto de la *circular* del PSOE número 20 fechada el 11 de mayo en donde se decía: «Igualmente es necesario que los militantes no abran con escritos, artículos o polémicas un debate teórico *inútil*, dado que los principios marxistas del partido no los pone en duda nadie dentro del partido». *Ibidem*, p. 47, *nota* 3. Léase, la reproducción de dicha ‘circular’ en, CASTELLANO, Pablo, *Yo sí me acuerdo...*, *op.cit.*, p. 441. Y por último véase la Noticia, “Alfonso Guerra: «El PSOE sigue siendo marxista»”, *El País*, 10 de mayo de 1978.

²⁰⁹ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 519.

²¹⁰ GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Evolución ideológica del..., *op.cit.*, p. 66. Sobre la crisis del citado ‘proyecto ideológico’ no deje de consultarse las aportaciones de, SHARE, Donald, “Transition to Democracy, the Remergence of the PSOE, and Ideological Crisis” en *id.*, *Dilemmas of Social...*, *op.cit.*, pp. 36-66.

²¹¹ Noticia, “PSOE conmemora sus cien años de existencia en vísperas del XXXVIII Congreso”, *El País*, 3 de mayo de 1979.

tan traído asunto del marxismo, no iba a constituirse en modo alguno en el campo de batalla del trascendental Congreso de mayo²¹².

Llegada la ocasión e inaugurado el citado Congreso, no hubo ya más equívocos sobre los dilemas a resolver. Más allá del debate teórico a que dio lugar la cita que, en modo alguno, tuvo una gran altura teórica²¹³, la propuesta en el discurso de apertura por parte secretario general de abandonar el marxismo como elemento definitorio de la organización, provocaría todo un terremoto político, tanto en los sectores de la derecha –ante una posible radicalización en caso de fallar la mencionada *operación*– como de la izquierda comunista en plena actualización de su doctrina política²¹⁴.

Construir en libertad sería el eslogan del primero de los Congresos socialistas citados en mayo de 1979. En concreto, del 17 al 20 de mayo. Ahora bien, pero la aprobación de una ponencia política que representaba el triunfo de las posiciones a favor de mantener el marxismo como elemento definidor del PSOE, actuaría como el desencadenante de la dimisión de Felipe González en el transcurso del mismo, quien cerraría aquel encuentro con una frase lapidaria: “¡Hay que ser socialistas antes que marxistas!”²¹⁵. No era la primera vez que Felipe González dimitía de sus responsabilidades²¹⁶. Sin embargo aquella decisión marcó el punto de inflexión

²¹² De poco o nada sirvieron los mensajes apaciguadores del propio Alfonso Guerra en varias declaraciones a los medios de comunicación: «No creo que en la polémica sobre la conveniencia o no de quitar el término marxista haya diferencias ideológicas profundas, sino diversas posiciones tácticas». Noticia, “Un informe de Felipe González abrirá las sesiones del congreso socialista”, *El País*, 15 de mayo de 1979.

²¹³ Sobre la ‘penuria intelectual’ histórica del socialismo español: PAÉZ-CAMINO, Feliciano, “Tradición y mitos en el socialismo español”, *Leviatán*, nº 5, (1981), pp. 73-82. Recuérdense aquí también las afirmaciones de, BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, p. 123.

²¹⁴ Primero conviene recordar algunas frases que el propio Felipe González señalara en el XXVII Congreso socialista en diciembre de 1976, y de las que pronto se arrepentiría como él mismo ha reconocido: «En esta hora es necesario rendir el homenaje que merece, de admiración y de respeto, al hombre que a nivel internacional contribuyó de manera fundamental, con sus ideas y con su propia lucha personal, a lo que se ha venido llamando el socialismo científico. Homenaje a Carlos Marx para desagrararlo de tanto ataque despiadado e ignorante como recibe de todos los reaccionarios de la tierra, y también para rescatarlo de la ignorancia y de la manipulación de aquellos que, diciendo seguirlo o servir a sus ideas, no han hecho más que elevar el marxismo a los altares del doctrinarismo dogmático. Marx nos legó un método de análisis de la realidad social que permitía revolucionar esa misma realidad injusta» [...] «Jamás podría el Partido Socialista renunciar a las ideas de Marx o abandonar sus valiosas aportaciones metodológicas y teóricas. Tampoco puede el socialismo asumir a Marx como un valor absoluto que marca la línea divisionaria entre lo verdadero o falso, lo justo o lo injusto. Asumir a Marx, como asumir a nuestros propios compañeros del pasado, significa recoger con sentido crítico su aportación a la lucha por la construcción de una sociedad nueva, tal como la define en la declaración de principios de nuestro Partido». Por otro lado, véase el “Discurso de Felipe González, primer secretario del PSOE, al XXVIII Congreso (Madrid, 17 de mayo de 1979)” en CHAMORRO, Eduardo, *Felipe González...*, *op.cit.*, pp. 308-338, así como las inmediatas reacciones en, Noticia, “Felipe González: «Debemos asumir críticamente a Marx y a todos los socialistas»”, *El País*, 18 de mayo de 1979. Véase aquí de nuevo las tesis mantenidas por, ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, *El PCE...*, *op.cit.*, y en concreto el epígrafe, “El PSOE al final del proceso: triunfo electoral y reconversión ideológica”.

²¹⁵ Cuestión calculada antes de la celebración del propio congreso socialista por parte del Secretario General quien sabedor de su *liderazgo*, entendió desde muy pronto que no de aceptarse su posición y obtener un *voto de castigo* considerable, aquello se constituiría en la más «evidente señal de que ‘hay que marcharse y ver quién se hace cargo de esto’». Noticia, “La ejecutiva del PSOE tratará de amortiguar la polémica ideológica”, *El País*, 17 de mayo de 1979; y, Noticia, “La retirada de Felipe González abre un proceso de clarificación interna del PSOE”, *El País*, 22 de mayo de 1979.

²¹⁶ Véanse aquí lo apuntado por Nicolás Redondo sobre las razones de las respectivas dimisiones de Felipe González y de Alfonso Guerra de los cargos que ocupaban en la Comisión Ejecutiva en los años 1972 y 1973 en, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, *op.cit.*, pp. 95-96.

en la transición del socialismo. “Verdadero drama” fue la expresión elegida por Santos Juliá para definir lo que allí aconteció: “[e]l problema fue que una aprobada la resolución no se encontró a nadie que estuviera dispuesto a ponerse a la cabeza no ya de las amplias masas populares sino de la más manejable masa de delegados”²¹⁷.

La posterior creación de una Comisión Gestora encargada de preparar el Congreso extraordinario en el que se clarificarán los aspectos más controvertidos que habían conducido a la crisis, reflejaron más allá de las motivaciones ideológicas, la existencia de un enfrentamiento entre dos modelos y concepciones de partido²¹⁸. Enfrentamientos, en donde la crítica a la gestión de la Ejecutiva saliente, el fuerte liderazgo de Felipe González y el férreo control del Partido por Alfonso Guerra, junto con la falta de democracia interna, se convirtieron en los principales argumentos de los *críticos* en aquellos meses entre ambos Congresos²¹⁹.

En relación a esta última cuestión, en el mismo XXVIII Congreso de mayo se aprobaría una propuesta presentada por la delegación sevillana en la Comisión de Organización y Estatutos así como en el plenario, que a la postre transformaría por completo el modelo organizativo del PSOE. Resolución que permitiría, en adelante, un control casi absoluto de la dirección sobre el funcionamiento interno del partido²²⁰. La aprobación sin mayores discusiones de esta propuesta aseguró, de antemano, la vuelta de Felipe González, así como el triunfo de las posiciones a favor de renovar el socialismo. Todo lo cual desanimaría, en adelante, no pocos intentos de crítica y de oposición contra la dirección socialistas en los siguientes²²¹. Y es que la asegurada vuelta de González se convirtió, pese a las posiciones críticas, en un reclamo mayoritario entre las filas socialistas, pues más allá de cuestiones ideológicas en riesgo estaba

²¹⁷ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 534. Y remarcaba como tras los gritos que pedían la vuelta de Felipe González, «[l]os críticos, por su parte, se quedaron sin aliento ante los clamores levantados por González y fueron incapaces de presentar la candidatura de un nuevo secretario general ni de una ejecutiva alternativa». *Ibidem*, pp. 536-537.

²¹⁸ La composición de la Gestión Gestora sería la siguiente: Presidente, José Federico de Carvajal; Vocales, Ramón Rubial, Carmen García Bloise, José Prat y Antonio García Duarte. Datos procedentes de, MARTÍN NAJERA, Aurelio, *Partido Socialista Obrero...*, *op.cit.*, p. 46. Véase el *crítico* informe de gestión presentado por los mismos pocos meses después: AHFPI, PSOE, “Informe [de la] Comisión Gestora. Madrid, 28-9-1979”, Madrid, 1979, sig. Fc 257.

²¹⁹ Muy significativo, en este sentido, fueron las diversas octavillas y material que repartieron los militantes socialistas en reuniones y demás actos públicos, en donde se criticaba duramente la deriva política y organizativa del PSOE. Entre otros muchos ejemplos, véase: AHFFLC, “Manifiesto para la conferencia socialista. Madrid 15 y 16 de septiembre”, 1979?, sig. 185-21.

²²⁰ El sistema de elección de delegados y de voto, a propuesta de una resolución de organización de la Federación de Sevilla, se modificó. El sistema extremadamente simple en su concepción, y extremadamente negativo en su concepción democrática, se basó en un voto por delegación en los sucesivos congresos socialistas. De este modo, la formación de las necesarias nuevas mayorías se simplificó. Todo ello originaría un nuevo sistema de representación que, con el paso del tiempo, daría lugar al nacimiento de clientelas políticas, lo que posibilitó, asimismo, que los resultados de los congresos fueran sabidos de antemano. Primero, consúltense: AHFPI, PSOE-CF, “Documentos de trabajo elaborados por el Comité Federal: política, estatutos, política económica, emigración y defensa: 28 Congreso”, Madrid, mayo de 1979, sig. Fc 244; AHFPI, PSOE-CE, “Memoria 28º Congreso. Vol. III, Propositiones orgánicas: organización y estatutos, administración, formación, documentación, propaganda e información sindical, juventudes”, Madrid, mayo de 1979, sig. C 149; AHFPI, PSOE, “Resolución de Organización y Estatutos. 28º Congreso del PSOE”, Madrid, mayo de 1979, Fc 821. Y segundo sobre el funcionamiento interno del PSOE a partir del XXVIII Congreso extraordinario y sus resultados véanse: ALONSO de los RÍOS, Cesar y ELORDI, Carlos, *El desafío socialista...*, *op.cit.*; TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*; BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*; MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa...*, *op.cit.*; especialmente, MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*

²²¹ Véase, Noticia, “La corriente «felipista» domina claramente el Congreso Extraordinario del PSOE”, *El País*, 29 de septiembre de 1979.

un liderazgo político arrollador. No obstante, aquello tenía un inconveniente. A partir de la advertencia de Felipe González de “aquí mando yo o sobreviene el caos”, como recoge de nuevo García Santesmases, el problema es que el mismo interesado rechazaría ser la “síntesis entre las distintas corrientes del socialismo para encabezar una de ellas que, si no es mayoritaria ideológicamente en el seno del partido, sí lo es por su liderazgo indiscutible”²²².

Cerrado el traumático Congreso, por lo demás, “[l]o que se dice durante este verano es tan importante como lo que se empieza a callar”²²³. Ahora bien, no faltaron los posicionamientos públicos de destacadas figuras socialistas en los medios del entorno del PSOE. Prolíficos fueron los “críticos”. Más allá de la publicación del que fuera conocido como el “Manifiesto del grupo Bustelo-Gómez Llorente-Castellano” existieron algunas otras valiosas aportaciones²²⁴.

A destacar las de uno de los firmantes del anterior *Manifiesto*, Luis Gómez Llorente, probablemente él de mayor altura teórica de aquel grupo²²⁵. En una conferencia pronunciada en la Federación Socialista Madrileña el 29 de junio de 1979 avisaba, primero, del peligro que de “muchos compañeros socialistas hablan casi como liberales progresistas”. Tras defender el legado de Marx y de proponer medidas acordes para la salida de la crisis económica, no sólo es que defendiera la necesidad de mantener el *concepto de clase* como categoría fundamental, sino que iba más allá: “[y]o quiero llamar la atención [...] [de] que puede haber partidos con resoluciones políticas muy de izquierda clásica [...] y que, sin embargo, sean partidos que estén marchando a pasos agigantados hacia su derechización o, como suele ser uso vulgar de la palabra, hacia su socialdemocratización”. Y si existía un espacio donde esta cuestión se visualizaba era en la *táctica de la conquista del poder*: “No es la primera vez que hablo ante vosotros –insistía Gómez Llorente– del peligro electoralista y del peligro parlamentarista”²²⁶. Lo que, en suma, llevaba a cuestionar la estrategia de la “eficacia electoral”. Con todo el problema era otro bien distinto a la estricta definición de marxista o no: “Exonerando, dicho sea claramente, al compañero Felipe González de responsabilidad personal en el fenómeno” de la crisis del PSOE, concluía Gómez Llorente como “[h]a sido el partido, y más en particular los que hemos sido sus dirigentes, quienes han montado el felipismo. Al partido corresponde analizarlo y corregirlo”. Todo ello con un mensaje final: “No podemos continuar dejándonos arrastrar inconscientemente por técnicas publicitarias propias del consumismo que pretende la simplificación de nuestro mensaje”²²⁷. Tocaba cerrar filas.

La posterior victoria de la posiciones “oficialistas” en el segundo de los Congresos en septiembre –los días 28 y 29– de aquel año, marcado por la intensidad y el dramatismo con el que se vivieron los debates, determinarían el rumbo casi definitivo del nuevo socialismo. Por

²²² GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Las dos opciones...”, *op.cit.*, p. 42.

²²³ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 538.

²²⁴ “Manifiesto del grupo Bustelo-Gómez Llorente-Castellano”, *El Socialista*, n° 122, 19 de agosto de 1979. Manifiesto firmado también por Francisco Bustelo, Fernando Morán y Joan Pastor y 112 firmas más. Entre otras cuestiones allí se afirmaba: «Nuestro criterio es ir hacia la síntesis ideológica, y, consecuentemente, optamos por una dirección proporcional, pero aceptaremos, en todo caso, las decisiones del Congreso».

²²⁵ Nos remitimos aquí a lo dicho en el apartado, “2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: entre la historia oficial/militante y la literatura partidista y otros materiales de estudio”.

²²⁶ De muy parecida opinión era el propio García Santesmases: «Este partido electoralista, parlamentarista, dirigista, centralista, desideologizado, anticomunista, era el que se estaba constituyendo». GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Las dos opciones...”, *op.cit.*, p. 40.

²²⁷ La citada conferencia está recogida en, GÓMEZ LLORENTE, Luis, “En torno a la ideología y la política del PSOE”, *Zona Abierta*, n° 29, (1979), pp. 23, 28, 29, 30, 31, 34, 35 y 36, respectivamente. Véase en paralelo las aportaciones de, GOMÁRIZ, Enrique, “Por una verdadera estrategia”, *El socialista*, 29 de abril de 1979.

superados podían darse buena parte de las *clásicas* “contradicciones del socialismo”²²⁸. A pesar de esto se mantuvieron las *formas*, al mismo tiempo, que se evitaron las purgas innecesarias, mientras que a los “críticos” se les apartaría sin mayores revuelos de los puestos de responsabilidad²²⁹.

El eslogan del XXVIII Congreso extraordinario del PSOE –celebrado los días 28 y 29 de septiembre– resultaría premonitorio: *Forjando el socialismo*. ¿Qué socialismo? era la pregunta a resolver. En todo caso, acercarnos a lo que allí se planteó, sin querer ni poder entrar en el fondo de la discusión que tuvo lugar, permite obtener una imagen meridianamente clara de la identidad y de la cultura socialista que se gestó en aquel momento de cambio²³⁰. Una particular identidad y cultura política, que los socialistas tanto a nivel de Partido como de Gobierno arrastrarían hasta su salida del poder político.

Lo que, en primer término, sobresale de la propia documentación pre-congresual del XXVIII Congreso extraordinario –quizás la de *ropaje* teórico de mayor calado y recorrido– es la necesidad de clarificar el papel histórico del socialismo. La primigenia *misión histórica* del socialismo va llenándose de contenido político:

«52. El partido socialista ha adquirido grandes responsabilidades frente a la sociedad española y, más concretamente, frente a los millones de electores que le han confiado su voto, para los cuales representa una verdadera opción de transformación de las condiciones de vida. Estas responsabilidades, así como el compromiso indisoluble con la defensa de los intereses de los trabajadores, conducen indefectiblemente a una concepción del partido como instrumento y nunca como fin en su mismo. En consecuencia la acción del partido no puede estar volcada hacia su interior, más allá de lo mínimo necesario para dotarse de una estructura que lo haga eficaz en su misión transformadora de la sociedad»²³¹.

Una misión encomendada a una generación de dirigentes ya sobradamente preparados para las tareas de gobierno:

«4. En el socialismo, cada generación debe reelaborar la herencia recibida a fin de perseguir con eficacia la lucha por la emancipación de los trabajadores y, con ellos, de toda la sociedad»²³².

Con la tarea histórica definida –*la vía democrática hacia el socialismo*– y con una dirigencia con *ansias de poder*, el siguiente paso fue dotarse de un “programa típicamente

²²⁸ La composición de la Comisión Ejecutiva entrante sería: Presidente, Ramón Rubial; Secretario General, Felipe González; Vicesecretario General, Alfonso Guerra; Secretaria de Organización, Carmen García Bloise; Secretario de Administración, Emilio Alonso Sarmiento; Secretario de Formación, José M^a Maravall; Secretario de Estudios y Programas, Javier Solana; Secretario de Política Sectorial, Ciriaco de Vicente Martín; Secretario de Prensa y Propaganda, Guillermo Galeote; Secretario de Política Municipal, Luis Fajardo Spínola; Secretario de Relaciones Políticas, Enrique Múgica; Secretario de Relaciones con las Juventudes Socialistas, Juan Antonio Barragán; Secretaria de Política Autonómica, María Izquierdo Rojo; Secretario de Política Sindical, Joaquín Almunia; Secretario de Emigración, Francisco López Real; Secretario de Cultura, Ignacio Sotelo; Vocales, Carlos Cigarrán, Gregorio Peces-Barba, José Federico de Carvajal, Donato Fuejo, Ramón Obiols, Pedro Bofill, José María Benegas y José Ángel Fernández Villa. Datos procedentes de, MARTÍN NAJERA, Aurelio, *Partido Socialista Obrero...*, *op.cit.*, p. 47.

²²⁹ Véase aquí, una vez más, la opinión que le merecería la nueva dirección a, CASTELLANO, Pablo, *Yo sí me acuerdo...*, *op.cit.*, pp. 267 y 320, respectivamente.

²³⁰ Ejemplo de ello en, AHFPI, PSOE-CE, “Ponencias presentadas al Congreso Extraordinario”, Madrid, 1979, sig. Fc 259.

²³¹ AHFFLC, PSOE, “59 Tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE”, Madrid, julio de 1979, sig. 185-21, p. 21.

²³² AHFFLC, PSOE, “59 Tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE”, Madrid, julio de 1979, sig. 185-21, p. 4.

reformista” lo que se conocería ya oficiosamente como una “alternativa progresista”²³³. Por aquí caminaba la *actualización del proyecto socialista*²³⁴. Inconveniente a resolver: los excesos verbales y discursivos e incluso programáticos que se habían discutido y alcanzado en anteriores congresos socialistas. A saber, aquello que José María Maravall no sin cierto ingenio llamara “las telarañas ideológicas de la visión política” para *arremeter*, a continuación, contra la *derrota total* del marxismo como pensamiento político. Las bases teóricas del socialismo que, en adelante, se denominaría como “reformismo radical”, quedaban asentadas como “la única vía defendible que evita la tentación totalitaria o la tentación derechista”. Aquella, en suma, era la “única opción honesta desde el punto de vista político e intelectual”²³⁵.

La centralidad de los debates en torno a la definición o no del marxismo del PSOE desarrollados en el XXVIII Congreso extraordinario, estuvieron caracterizados –como en el anterior encuentro– por su escaso contenido teórico-ideológico tanto por parte de los “oficialistas” como por los “críticos”²³⁶. Con una nota añadida: el más que constatado pragmatismo a la hora de abandonar las señas de identidad tradicionales del socialismo²³⁷. La posterior y rápida decisión de abandonar el marxismo significó en palabras de Paul Heywood, *el triunfo de la adaptabilidad* de la organización socialista al nuevo contexto político, económico, social y cultural de la sociedad española:

²³³ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia..., *op.cit.*, p. 49.

²³⁴ «Para potenciar esta alternativa progresista, necesitamos más que nunca un proyecto positivo y viable que sintetice las aspiraciones de amplios sectores sociales, permitiendo su concienciación y movilización frente al sistema, permitiendo, en otras palabras, la actualización del proyecto socialista». AHFPI, PSOE, Secretaría Federal de Formación, “Carpeta del militante. Resumen de la Resolución Política del Congreso Extraordinario”, Madrid, 1979, sig. Fa 186, p. 3 [*subrayado* en original].

²³⁵ MARAVALL, José M^a, “Del milenio a..., *op.cit.*, pp. 90 y 95-96, respectivamente. La conclusión del ‘ideólogo’ del PSOE era sencilla y clara: «Y sólo se ganará con un partido potente y moderno que pueda desarrollar una práctica política verdaderamente socialista». *Ibíd.*, p. 97. Por lo demás, y apaciguado el conflicto interno, pronto vendrían las críticas al propio Maravall dentro de la organización. Entre las más lúcidas y con mayor soporte teórico ha de destacarse la de, RODRÍGUEZ ARAMBERRI, Julio, “El proyecto socialista y la crisis económica: reflexión sobre algunas propuestas estratégicas”, *Zona Abierta*, n^o 22, (1979), pp. 25-44.

²³⁶ Consúltense, una vez más, las críticas de, BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, p. 123.

²³⁷ Los artículos publicados en las revistas científicas y de debate del entorno socialista a lo largo del año 1979, vienen a confirmar la dualidad de planteamientos. Al respecto véanse las diferentes opiniones mantenidas por los principales representantes de cada corriente en revistas como *Leviatán*, *Zona Abierta* [números 20, 22 y 29 con artículos de Antonio García Santesmases, Ludolfo Paramio, Enrique Gomáriz, Luis Gómez Llorente, y especialmente el de Maravall, muchos de ellos ya citados], *Sistema* [números 29-30 y 32 con artículos de Ignacio SOTELO, –“Socialismo y marxismo..., *op.cit.*; Elías DÍAZ –“Marxismo y no marxismo: Las señas de identidad del Partido Socialista Obrero Español”, n^o 29-30, (1979), pp. 211-232; y, *id.*, “El lado oscuro de la dialéctica: Consideraciones sobre el XXXVIII Congreso del PSOE”, n^o 32, (1979), pp. 35-50– o los de, Alfonso Lazo o José Félix Tezanos]. Igualmente aparecerían un conjunto de libros que vinieron a representar ambas posiciones. Por la parte ‘oficialista’: PALOMARES, Alfonso S., *El Socialismo y...*, *op.cit.*; y, por parte de los críticos, BUSTELO, Francisco, *Introducción al socialismo...*, *op.cit.*; CASTELLANO, Pablo, *Sobre el Partido...*, *op.cit.*. Sobre el desarrollo del debate en el XXXVIII Congreso extraordinario véanse: ROMÁN, Paloma, *El Partido Socialista...*, *op.cit.*, pp. 505-562; GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, pp. 351-369; JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, pp. 506-521; TEZANOS, José Félix, “El PSOE entra en democracia” en *id.* (coord.), *PSOE 125...*, *op.cit.*, pp. 134-136. Por último véase, TEZANOS, José Félix, “Radiografía de dos..., *op.cit.*. Por lo demás, muy significativo fue el libro publicado a modo de *historia oficial* de, GUERRA, Alfonso (ed.), *Este viejo y...*, *op.cit.*

«The triumph of the PSOE over the PCE represented a triumph of adaptability to political circumstance. Essentially, in the course of the transition, both parties had to confront the problem of the role and relevance of Marxist formulations in advance industrial societies»²³⁸.

Los debates y lo que allí sucedió son sobradamente conocidos. Nos interesan más sus consecuencias a corto y medio plazo. El abandono del marxismo en el conocido “popularmente” como el congreso veintiocho y medio, sería defendido por Joaquín Almunia con *escaso entusiasmo* –como ha recordado en más de una ocasión Alfonso Guerra–. Así pues, en términos históricos, resultaría más significativo la reordenación de la estrategia de conquista del poder político que el propio debate ideológico Asumido, además, con escaso entusiasmo un programa reformista propio de la tradición socialdemócrata clásica, José María Maravall –Secretario de Formación del PSOE– sería el encargado de rediseñar la citada estrategia política. Aquí es cuando aparece la teorización de la conquista de “espacios de poder” –una vez ocupadas las “parcelas de la libertad”– o el “proceso de transformaciones acumulativas”²³⁹.

Concretado el programa y la estrategia de conquista del poder político, correspondía ahora definir una “nueva política de alianzas” dentro de la familia socialista. A nivel político, el fin de la *diáspora socialista* se había dado por logrado en abril de 1978, con la finalización del llamado proceso de “Unidad Socialista”²⁴⁰. Resuelto esto, el principal frente giraba en torno a

²³⁸ HEYWOOD, Paul, “Mirror-images: The..., *op.cit.*, p. 193. Véase aquí también la tesis mantenida por, NASH, Elizabeth., “The Spanish Socialist Party Since Franco: From Clandestinely to Government, 1976-1982” en BELL, David S. (ed.), *Democratic Politics in Spain: Spanish Politics after Franco*, London, St. Martin’s Press, 1983, pp. 29-62.

²³⁹ Santos Juliá ha definido la transformación programática de la siguiente manera: «De esta manera, el PSOE se presentaba, por una parte, como la fuerza moderada de la que dependía la estabilización consolidación de la democracia, llevando a término la reforma institucional del Estado y reforzando su papel como agente redistribuidor de la riqueza; pero no renunciaba, por otra, a su identidad de izquierda acentuando el papel que al Estado correspondía como sujeto protagonista de las reformas sociales acumulativas». JULIÁ, Santos, *Los socialistas en..., op.cit.*, p. 554. No obstante, el PSOE mantendría como principios y valores el socialismo autogestionario en el XXVIII Congreso extraordinario en donde además indicaba: «7. El proyecto global se va realizando mediante la acumulación de las luchas y conquistas de cada etapa histórica. El ritmo del proceso y el alcance de las nuevas metas están condicionados, en cada momento, por el grado de apoyo que consigue el proyecto socialista en el seno de la sociedad». AHFFLC, PSOE, “59 Tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE”, Madrid, julio de 1979, sig. 185-21, p. 3.

²⁴⁰ Entre otros partidos, la mayoría minúsculos, que se fueron sumando al PSOE se encontraban: Convergencia Socialista de Madrid, Movimiento Socialista de Cataluña, Partido Socialista de Galicia, que a su vez formaban parte de la Federación de Partidos Socialistas. Por otro lado, tan sólo sería a partir del XXVII Congreso de 1976 cuando se comenzaría a superar en el plano teórico –más allá de afirmaciones no del todo ciertas– la ruptura entre el ‘interior’ y el ‘exterior’ de la organización: «El Partido Socialista Obrero Español declara que la unidad de los socialistas españoles contribuirá a la obtención, afianzamiento, desarrollo y defensa de la democracia en España, y este Congreso celebra que en este sentido se hayan dado pasos fundamentales para esta unidad, como es la reunificación e integración de todos los sectores del Partido. Con esa reunificación se considera superada la escisión que se produjo en el PSOE en 1972». AHFFLC, Fondo Saracibar, PSOE, “Dictamen Ponencia Política. XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1976”, Madrid, 7 de diciembre de 1976, sig. 002264-001, p. 4. Otro documento interno de interés en, AHFPI, PSOE, “Informe [de] reunificación”, Madrid, 1976, sig. Fba 222. Véanse aquí también, GONZÁLEZ, Felipe, “La unidad de los socialistas”, *Sistema*, nº 15, (1976), pp. 45-51; y, MATEOS, Abdón, “Auge y unidad de los socialistas durante la transición” en *El PSOE contra..., op.cit.*, pp. 456-465. En todo caso, el caso más trascendental en términos de reunificación del socialismo, tanto a nivel afiliativo como a nivel simbólico, sería la incorporación del Partido Socialista Popular de la mano de Tierno Galván –consúltese, RUBIO, M^a Amalia, *Un partido en la oposición: el Partido Socialista Popular*, Granada, Comares, 1996–. Por su parte, la UGT también forjaría una política de alianzas que terminaría ‘engullendo’ en la práctica totalidad de la USO, a partir del Congreso Extraordinario de Unificación UGT-USO celebrado el 18 de diciembre de 1978. Como ha recordado, una vez más, Nicolás Redondo aquel «acontecimiento [fue] muy importante. En primer lugar, porque fue y sigue siendo, el único proceso de unidad sindical que se ha

qué tipo de relaciones a establecer con el sindicato hermano. Aquí se iniciará una colaboración diferente a la adoptada por los partidos de la socialdemocracia del sur de Europa, al apostar por unas relaciones partido-sindicato por la *vía nórdica*. Vía caracterizada por “una colaboración mutua (entre partido-sindicato)”, lo que a la postre se terminó convirtiendo en “uno de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos principales, como habían hecho otras familias socialistas en el norte de Europa”²⁴¹. Esta colaboración con la UGT va a devenir en central, en tanto el sindicato hermano, el aliado estratégico, tendrá una función fundamental para la organización socialista: enlazar discursiva y programáticamente con la idea de la *centralidad de la clase obrera*.

Dicho todo lo anterior, y a pesar del triunfo de las tesis de Felipe González y sus correligionarios en el XXVIII Congreso extraordinario, se mantendría en el plano teórico el “Programa Máximo”, lo que no sería óbice para que en la nueva estrategia socialista los principios ideológicos e identitarios tuvieran una escasa relevancia en la toma de decisiones. Asimismo la renuncia al marxismo se acompañaría con una moderación calculada del lenguaje²⁴². Sin embargo, el PSOE aún no se presentó como el partido de la modernización, sino que se definía en consonancia con el nuevo papel a desarrollar en el contexto político: “ser el garante de la consolidación de la democracia”²⁴³.

producido en nuestro país. En segundo lugar, porque la aportación de cuadros y militantes de USO contribuyó muy poderosamente a fortalecer el espacio del sindicalismo de orientación socialista». GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, *op.cit.*, p. 101. Consúltense asimismo: ZAGUIRRE, Manuel y HOZ, José M^a de la, *Presente y futuro del sindicalismo*, Barcelona, Nova Terra, 1976; y, ZUFIAUR, José M^a, *Unión Sindical Obrera*, Barcelona, Avance, 1976. Entre las escasas referencias fruto de investigaciones, MORERA, Julio, “La fundación de USO: circunstancias políticas y objetivos”, *Debat*, n^o 5, (1985); MARTÍN ARTILES, Antonio, “Del blindaje de la sotana al sindicalismo aconfesional (USO en la oposición al régimen de Franco: 1960-75)”, *El Proyecto*, n^o 8, (1989), pp. 43-48; MATEOS, Abdón, “Los orígenes de la Unión Sindical Obrera: Obrerismo juvenil cristiano, cultura sindicalista y proyecto socialista”, *XX Siglos*, n^o 22, (1994), pp. 107-118; y, ROCA MOHEDANO, Manuela, “La Unión Sindical Obrera (USO): del nacimiento del nuevo movimiento obrero durante el franquismo a la búsqueda de espacios sindicales en la transición”, *Historia del Presente*, n^o 18, (2011), pp. 113-131. Por último véase el capítulo “3. Sindicalismo y transición” de, VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, *op.cit.*, pp. 51-ss.

²⁴¹ ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, *op.cit.*, p. 12. El propio autor ha definido este tipo de relaciones a partir de un modelo teórico tradicional, basado en la colaboración solidaria y en la necesidad de compartir los *recursos de poder* entre partido-sindicato para la obtención de unos mismos fines: «Cuando el Partido Socialista llegó al poder en 1982, el modelo oficial de relaciones con la Unión General de Trabajadores seguía siendo solidario. Las resoluciones de los congresos del PSOE mantuvieron durante toda la década de los ochenta la afirmación tradicional de que compartían con este sindicato los mismos objetivos finales, como venía ocurriendo desde el pasado, para lo cual trabajaba cada uno, ‘fraternalmente’, en su esfera de actuación más propia. Bien es cierto que esta división de tareas no era totalmente rígida, pues se aceptaba que los sindicatos, en general, se implicaran directamente en el ámbito político». *Ibidem*, pp. 104-105.

²⁴² Con todo, y de cara a no tensar más a la organización, se reconocía en las tesis políticas del Congreso extraordinario en el apartado de *principios*, que el PSOE «[a]sume también el marxismo como instrumento –ni dogmático ni exclusivo– para el análisis y la consiguiente transformación de la realidad, en la búsqueda de una sociedad radicalmente distinta tanto de la sociedad capitalista como de cualquier forma de totalitarismo». AHFPI, PSOE, Secretaría Federal de Formación, “Carpeta del militante. Resumen de la Resolución Política del Congreso Extraordinario”, Madrid, 1979, sig. Fa 186, p. 1. Declaración política que en sucesivos congresos desaparecería, omitiéndose en adelante, incluso, el propio vocablo ‘marxista’ en sus diferentes acepciones. Ejemplo de ello, sin ir más lejos, en: AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 5.

²⁴³ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 537.

El nuevo rumbo del PSOE se caracterizaría, a partir de entonces, por la imposición de un fuerte *materialismo político* –a partir de las propias elaboraciones teóricas de Maravall²⁴⁴– en el que “si para alcanzar el gobierno hay que renunciar a las señas de identidad del período anterior, si hay que enterrar el patrimonio ideológico acumulado dispersamente en resoluciones, consignas y programas, no nos debemos azorar por ello: sólo alcanzando el gobierno se puede transformar la sociedad”²⁴⁵. Entre los resultados de este proceso de conversión ideológica y política, se ha destacar igualmente la moderación de la imagen del PSOE de cara al electorado.

Los posteriores testimonios de los dirigentes socialistas han venido justificando tanto el radicalismo de los primeros años después de la escisión socialista, como la posterior moderación a partir del XXVIII Congreso. La lectura que se desprende es la siguiente: el PSOE pecó de un *falso radicalismo* motivado por la triple necesidad de reconstruir el partido en el interior, aunar las señas de identidad, y adaptarse a los cambios por los que la sociedad española había pasado en los últimos años. Alfonso Guerra así lo ha venido explicando (y justificando):

«Es más sencillo y si se quiere más complejo también. Un partido que vive cuarenta años en la clandestinidad, con poca estructura, requiere una carga ideológica, cada vez más fuerte, para su propia supervivencia. Y eso se va comprimiendo como el gas en una botella y en cuanto se quita el tapón el gas sale. Entonces ocurre que la carga ideológica se va perdiendo, pero se pierde no sólo en el Partido Socialista sino en toda la sociedad española»²⁴⁶.

4.2.2.3. La moderación programada (1979-1981)

Superado el *impasse* político y organizativo al que se vería abocado el PSOE en los meses posteriores al XXVIII Congreso extraordinario, la dirección socialista se centraría, en adelante, en el fortalecimiento de su “alternativa del poder”. El análisis de partida era del todo evidente. La incapacidad mostrada por los gobiernos de la UCD en lograr una salida razonable a la crisis política, económica y social por la que atravesaba el país, estaba impidiendo, según el propio análisis de los socialistas marcado por un fuerte determinismo histórico, “la revolución burguesa pendiente” para que España pudiera superar los lastres del pasado²⁴⁷. En estas circunstancias, y bajo los argumentos aquí descritos, el siguiente paso evolutivo será el siguiente: el PSOE planteará como propio el proyecto que le correspondía históricamente a “la derecha”. De este modo, en línea con su estrategia de la responsabilidad *histórica*, redefiniría, una vez más, su proyecto estratégico marcado ahora por la nueva definición de la “misión histórica” consistente en “democratizar, modernizar y europeizar” España.

²⁴⁴ Entre otros trabajos ya citados claves para lo que aquí estamos tratando: MARAVALL, José M^a, “Del milenio a..., *op.cit.*; id., “La alternativa socialista..., *op.cit.*”

²⁴⁵ GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Evolución ideológica del..., *op.cit.*, p. 68.

²⁴⁶ BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el..., op.cit.*, p. 132. Sin embargo, este ‘falso radicalismo’ empleado por el PSOE no dejaba de ser otra muestra más de su pragmatismo ideológico. Miguel Boyer lo ha concretado de la siguiente forma: «En todo movimiento político hay tácticas y estrategias, pero yo creo que el PSOE salió de las catacumbas con una acumulación ideológica, con una olla a presión donde se había ido cociendo en su propia salsa sin ninguna experiencia electoral. Yo creo que González pensaba que eso era algo natural y que iría desinflándose. Pensó que él no estaba en esa actitud, pero que creía que la crispación tenía sus tiempos y que se curaría con un contacto con la realidad a través de elecciones». Declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el..., op.cit.*, p. 301.

²⁴⁷ ARAMBERRI, Julio R., “El encanto y sus encrucijadas”, *Leviatán*, nº 10, (1982), p. 10. El mismo autor señalaba al respecto: «¿Quiere esto decir que en este país sea imposible construir una sociedad moderna y democrática? Lo que significa, más bien, es que esa tarea difícilmente puede ser asumida por los partidos políticos de la derecha y que es una responsabilidad que incumbe a la izquierda. Felipe González acertaba al decir que la revolución burguesa teníamos que hacerla nosotros. Pero, tal vez, no repara en que esa tarea, aun facilitada por la integración creciente de España en el sistema capitalista va a exigir un enfrentamiento a fondo con fuerzas muy poderosas de la sociedad española». *Ibidem*.

Este nuevo proyecto tendrá dos etapas de maduración. Primero, con el XXIX Congreso del PSOE de 1981 en donde se avanza decididamente en esta línea, aunque todavía con algunos titubeos; y segundo, durante el breve lapso de tiempo que transcurre entre la finalización del citado congreso y la redacción del programa electoral “Por el cambio”, que es cuando ya puede darse por concluido la configuración programática del “PSOE como el partido de la modernización”. Precisamente, estas últimas dos etapas, en diferentes niveles, han sido las que menos atención han recibido a pesar de su relevancia.

A principios de la década de los ochenta, el PSOE no dudaba en presentarse como “«la fuerza más consecuentemente democrática» de la política española actual”²⁴⁸. La derecha política y la izquierda comunista no pasaban por sus mejores momentos. Junto a la *amenaza involucionista* había que sumarle la permanente *amenaza terrorista*. “El golpismo es un fenómeno autónomo y no tiene nada que ver con situaciones políticas difíciles ni con supuestos estados de necesidad”, se llegaba a afirmar en un documento interno del PSOE²⁴⁹. Dado por finiquitado el *equilibrio de fuerzas* al que dio lugar la transición, y solucionados los problemas internos del PSOE, la organización comenzaría a perfilar la estrategia para la conquista del poder político de una forma decidida, clara, directa. Las *ambigüedades* habían llegado a su fin.

Por lo demás, existían más incertidumbres que certezas a la hora de definir una política de oposición responsable con el país y la democracia. Sintomático de estos *movimientos políticos* sería la estrategia diseñada y rediseñada en cada una de las tres reuniones del CF en aquel año ochenta²⁵⁰. A *nuevos tiempos* correspondían *nuevas tareas políticas* para el socialismo español:

«Corresponde a nuestro Partido ser el protagonista fundamental de la consolidación y enraizamiento en España de la democracia, entendiendo que ésta constituye el mejor camino para la defensa de los intereses de los trabajadores. Los socialistas sabemos bien que disponemos de un sistema de libertades que, aunque frágil e insuficiente, tenemos que cuidar, defender y desarrollar con nuestro trabajo como socialistas. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad, estemos donde estemos, sin delegarla en otros, sin reticencias»²⁵¹.

La *alternativa socialista* tenía que hacer frente a grandes y graves problemas. Desde la crisis estrictamente política a la económica en un “país profundamente desigual” en el que el “derecho al trabajo” se había convertido en el principal problema.

Apenas transcurrido un año desde la celebración de las segundas elecciones generales, no se podía perder más tiempo de cara a ir preparando las siguientes, donde se vaticinaba un “enfrentamiento entre dos grandes opciones, una conservadora y otra progresista”. El riesgo de un nuevo triunfo electoral de la “opción conservadora” era total: “[e]sta opción supone una congelación del proceso democratizador, incluso retrocesos en materias tan graves como la autonomía en su doble vertiente regional y municipal. Supone también el mantenimiento de los privilegios existentes en todas las esferas de la vida social”²⁵². Por tanto, había llegado la hora de hacer oposición en serio y sin contemplaciones, así como de presentar un programa realista a los problemas del país. Y este programa, la llamada ahora *respuesta progresista*, tendría una

²⁴⁸ AHFPI, PSOE, “Situación política y alternativa del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1419, p. 13.

²⁴⁹ AHFPI, PSOE, “Situación política y alternativa del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1419, pp. 9-10

²⁵⁰ En concreto se convocaron tres reuniones: 19-20 de enero, 24-25 de mayo y 18-19 de octubre. Para la documentación generada por este órgano de gobierno socialista remitimos a, AHFPI, PSOE-CEF, “Informe de gestión presentado al Comité Federal por la Comisión Ejecutiva Federal”, Madrid, 1980, sig. Fc 3976 vol. I, Fc 3977, vol. II, Fc 3979, vol. III, respectivamente.

²⁵¹ AHFPI, PSOE, “Situación política y alternativa del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1419, pp. 7-8.

²⁵² AHFPI, PSOE, “Situación política y alternativa del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1419, p. 21.

perspectiva temporal de no menos de veinticinco años de duración con el fin de construir la política de progreso. Consolidar la democracia y modernizar el país se constituían en sus principales metas.

Evitar cualquier tipo de triunfalismo se transformaría en la principal consigna en aquel momento. Bajo una óptica dominada por el afán electoralista que previa los más diversos escenarios políticos de futuro, el proyecto socialista, en primer término, se veía abocado a construir una hegemonía social como paso previo a la conquista del ejecutivo. Gramsci, aparecía así con toda su fuerza analítica. El poder institucional –tanto estatal como municipal– era una parte importante, aunque no la única, pues en la búsqueda de la “hegemonía del proyecto socialista implica una sociedad con un alto grado de asociación y de participación en la vida política, una mayoría articulada en un amplio bloque de clases que asuma el papel protagonista que le corresponde”²⁵³. En suma, llegaba la hora de la verdad en donde no se escatimarían medios ni recursos para el objetivo central, aun a costa de iniciar una dura campaña de desgaste contra el Gobierno con el evidente peligro de desestabilizar todavía más la precaria situación política.

Así fue. Durante los siguientes meses la oposición socialista se incrementaría notablemente: desde las elecciones en Euskadi y Cataluña en marzo de 1980, las crisis de gobierno de Suárez de abril-mayo, septiembre, octubre-diciembre a las que en paralelo les acompañaría la presentación de la “moción de censura” en mayo o la “cuestión de confianza” en septiembre de aquel mismo año²⁵⁴. Ahí estaba el nuevo y duro tipo de oposición política que terminaría, en parte, con la dimisión del propio presidente del Gobierno el 29 de enero de 1981²⁵⁵.

La estrategia de desgaste frente al ejecutivo de Adolfo Suárez que venía practicando el PSOE desde la salida de su último congreso –con evidentes paralelismos, por cierto, a la del Partido Popular de José María Aznar contra los gobiernos socialistas en los noventa²⁵⁶– se vería trastocada ante el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. De hecho, meses antes entre las propuestas manejadas por el PSOE para la salida de la crisis política figuró la “opción militar”. A saber lo que en su día Santos Juliá definió como los “vericuetos tortuosos”²⁵⁷.

Nos explicamos. En medio de la maraña de acontecimientos que rodearon a esta última etapa, en donde se ha de tener presente el papel que jugaron los servicios secretos de las potencias occidentales, así como el desarrollado por no pocas embajadas, sin olvidar los intereses de los grandes poderes económicos nacionales o internacionales, existen todavía capítulos por explorar en torno a los sucesivos intentos por hacer caer al gobierno de Adolfo Suárez²⁵⁸. Uno de los últimos datos conocidos lo ha aportado el que fuera durante muchos años

²⁵³ AHFPI, PSOE, “Situación política y alternativa del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1419, p. 29.

²⁵⁴ De notable interés en contenidos, GONZÁLEZ, Felipe, *Programa de gobierno presentado en las Cortes por Felipe González. Secretario General del PSOE: 28 de mayo de 1980*, Madrid, Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 1980.

²⁵⁵ Sobre aquellos complicados días, MELIÀ, Josep, *Así cayó Adolfo Suárez*, Barcelona, Planeta, 1981; y, MORÁN, Gregorio, *Adolfo Suárez: ambición...*, op.cit..

²⁵⁶ Un último libro que puede arrojar algo de luz sobre esta misma cuestión en, GONZÁLEZ CASANOVA, José A., *La derecha contra el Estado: el liberalismo autoritario en España (1833-2008)*, Lleida, Milenio, 2009. Y asimismo, CALERO, Juan R., *La construcción de la derecha española*, Murcia, Prócer, 1985.

²⁵⁷ JULIÀ, Santos, *Los socialistas en...*, op.cit., p. 548.

²⁵⁸ Para lo primero, TAMAMES, Ramón, *La oligarquía financiera en España*, Barcelona, Planeta, 1977; MORÁN, Gregorio, *El precio de...*, op.cit.; MONEDERO, Juan Carlos, “El misterio de la transición embrujada (un collage generacional sobre la transición española)” en id. y PANIAGUA, Juan Luis (eds.), *En torno a la democracia en España. Temas abiertos del sistema político español*, Madrid,

presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, en la segunda parte de las memorias – *Tiempos de construir*–. El dato no es nuevo, pues ha sido manejado por no pocos protagonistas e investigadores como lo evidencia otro ejemplo cercano: *Anatomía de un instante* de Javier Cercas²⁵⁹. Revela allí el político catalán lo que hasta el momento habían sido conjeturas más o menos elaboradas sobre el papel que decidió jugar el partido socialista en compañía de otras fuerzas políticas²⁶⁰.

Señala Pujol que el entonces dirigente socialista Enrique Múgica –una de las principales cabezas visibles del PSOE como número 3 del partido después de González y Guerra²⁶¹– en una reunión que tuvo con él en 1980, le propuso sustituir al presidente Suárez por un militar de “mentalidad democrática” cuyo candidato más probable hubiera sido Alfonso Armada²⁶². *Operación* en donde también estaban involucrados relevantes políticos de la propia UCD, entre ellos Rodolfo Martín Villa, incluidos también los comunistas. La suma de indicios de los que hasta el momento se tienen constancia, *navegan* en esta dirección. Una hipótesis que de

Tecnos, 1999, pp. 103-232; COLOMER, Josep M^a, *La transición a la democracia: el modelo español*, Barcelona, Anagrama, 1999; y, concretamente, la reeditada obra de, GARCÉS, Joan E., *Soberanos e intervenidos: estrategias globales, americanos y españoles*, Madrid, Siglo XXI, 2008; y asimismo, ALMENARA, Vicente, *Los servicios de inteligencia en España: de Carrero Blanco a Manglano*, Córdoba, Arcopress, 2010; y más recientemente, PEÑARANDA, José M^a de, *Desde el corazón del CESID*, Barcelona, Espasa, 2012; y para lo segundo, BAENA ALCÁZAR, Mariano, *Elites y conjuntos de poder en España (1939-1992). Un estudio cuantitativo sobre el Parlamento, Gobierno y Administración y gran empresa*, Madrid, Tecnos, 1999; FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, “Élites y poderes económicos en la España del siglo XX” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*, pp. 57-82; y también, ESTEFANÍA, Joaquín, *La Trilateral Internacional..., op.cit.*; por último, CAPILLA, Luis, *La Comisión Trilateral: el gobierno del mundo en la sombra*, Madrid, Acción Cultural Cristiana, 1993.

²⁵⁹ CERCAS, Javier, *Anatomía de un instante*, Barcelona, Mondadori, 2009.

²⁶⁰ «El PSOE tenía una auténtica obsesión por hacer caer a Suárez. Una prueba de ello es la visita que el destacado líder socialista Enrique Múgica me había hecho a finales del verano de 1980 a mi casa de Premià de Dalt para preguntarme cómo veríamos que se forzase la dimisión del presidente del Gobierno y su sustitución por un militar de mentalidad democrática. Manifesté mi total desacuerdo». PUJOL, Jordi, *Memorias II (1980-1983): tiempo de construir*, Barcelona, Destino, 2009. La primera parte de sus memorias en, id., *Memòries (1930-1980): història d'una convicció*, Barcelona, Proa, 2007. Igualmente véase el *boom* informativo que provocó la publicación de las citadas memorias y la contestación del propio Enrique Múgica en, Noticia, “Jordi Pujol revela que Enrique Múgica le sondeó para sustituir a Adolfo Suárez por un militar”, *El País*, 2 de octubre de 2009; Noticia, “La alargada memoria de Pujol”, *La Vanguardia*, 8 de octubre de 2009; Noticia, “Pujol: «Múgica vino a verme, y eso va a misa»”, *El Mundo*, 8 de octubre de 2009.

²⁶¹ Véase, MÚGICA, Enrique, *Itinerario hacia la libertad*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986; SANTAMARINA, Álvaro, *Enrique Múgica*, Madrid, Cambio 16, 1977; y, FERNÁNDEZ, Julio, *Enrique Múgica*, Madrid, Grupo 88, 1992. Sobre el papel a jugar por el dirigente socialista en caso de llevarse adelante dicha operación, Javier Cercas afirmaría que Enrique Múgica hubiera sido, a la sazón, Ministro de Sanidad, mientras que Felipe González hubiera sido el vicepresidente de aquel gobierno. Datos que extrae de la lista que en su día ‘circuló’ de un posible Ejecutivo que nunca llegó a configurarse y que aparece publicada en la citada obra [CERCAS, Javier, *Anatomía de un..., op.cit.*, p. 320 *nota a pie sin n.º*]. Véase asimismo sobre este episodio, FARRÀS, Andreu y CULLELL, Pere, *El 23-F a Catalunya*, Barcelona, ONCE / CPB, 1998. Por lo demás, tanto en el libro citado de Enrique Múgica como en los dos volúmenes de *memorias* hasta ahora publicados por Alfonso Guerra, incluyendo aquí también las biografías políticas de Felipe González, se ha omitido sistemáticamente este episodio. Igualmente, consúltese uno de esos libros que han pasado desapercibidos en el campo de la historia profesional, pero que debería tenerse en cuenta a la hora de reconstruir este episodio: MORALES, José Luis y CELADA, Juan, *La alternativa militar: el golpismo después de Franco*, Madrid, Revolución, 1982.

²⁶² De interés resulta el libro de, CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Conversaciones con Alfonso Armada: el 23F*, Madrid, Actas, 2001. Y evidentemente también el de, ARMADA, Alfonso, *Al servicio de la Corona*, Barcelona, Planeta, 1983.

confirmarse tan sólo reforzaría la obsesión de los socialistas por llegar al poder lo antes posible con y por los medios que fueran necesarios.

Fuera como fuese, el golpe de Estado del 23-F se constituyó en un hecho lo suficientemente grave para que el PSOE decidiera frenar temporalmente la estrategia de desgaste. Y lo que no es menos importante, dejaría de transitar de forma definitiva por aquellos “vericuetos tortuosos”. “El proceso de transición a la democracia no es un proceso que haya concluido” se señalaba en un desalentador informe de la dirección socialista al respecto²⁶³. El elaborado documento de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE no concluía ahí su valoración: “la democracia no está definitivamente consolidada. Estamos viviendo todavía una democracia frágil y sobre la transición penden aún importantes riesgos”²⁶⁴. Se constataba así mismo, a juicio de la dirección socialista, que la salida de la dictadura había generado una serie de déficit que impedían avanzar más firmemente en el proceso de democratización²⁶⁵. *Déficit* que se concretaban, primero, en que tras la muerte de Franco, “permanecen muy intactas fuerzas claves del sistema franquista”; segundo, se remarcaba la “debilidad de la derecha democrática”; y el tercer *factor condicionante* no era otro que “la izquierda tuvo siempre una fuerza insuficiente para inclinar la balanza definitivamente del lado de la democracia y del progreso”²⁶⁶. A todo lo anterior, se sumaban cuatro grandes problemas irresueltos: la “herencia patológica en la estructura territorial del Estado y [...] las reivindicaciones nacionalistas”; la “tradicional

²⁶³ AHFPI, PSOE-CEF, “Los problemas de la democracia. Informe de la CEF”, Madrid, abril de 1981, sig. Fc 598, p. 2.

²⁶⁴ AHFPI, PSOE-CEF, “Los problemas de la democracia. Informe de la CEF”, Madrid, abril de 1981, sig. Fc 598, p. 1.

²⁶⁵ En este sentido, y aunque la mayor parte de las veces se ha pasado por encima sin prestarle mayor atención, resulta cada día más evidente la participación y el apoyo económico de importantes sectores económicos y de la banca al 23-F. Mariano Guindal ha reconstruido este episodio con nuevas *pistas* a valorar oportunamente. Allí, por ejemplo, se cuentan una serie de llamadas personales unos días antes de Martín Villa a José María Cuevas –a quien se le reviste, por cierto, de una *cándida inocencia* política– pero narratambién de las fluidas relaciones entre el propio Cuevas y la UGT a través de José María Zufiaur –«José María esto está muy mal, si necesitáis cualquier cosa contad con nuestra ayuda», le diría el entonces Secretario General de la CEOE al dirigente ugetista a las pocas horas de la entrada de Tejero en el Congreso–. Ahora bien se desliza allí la sugerente tesis de que parte de los principales empresarios con Carlos Ferrer Salat a la cabeza estaban al tanto cuando no lo habían apoyado. De hecho, apunta un dato a tener más que presente: «El 23-F, el índice general de la Bolsa de Madrid (IGBM) cayó un leve 0,25 por ciento, pero al día siguiente se recuperó con creces hasta 111,75 enteros. La especulación se había notado tres días antes cuando bajó un 2 por ciento, lo que dejó que algunos círculos bien informados algo debían de saber». Y pese a lo cual el autor concluiría: «A los empresarios no les gustaba el Suárez de la segunda etapa, pero por primera vez en la historia, la burguesía empresarial española, había apostado fuertemente por las libertades. De lo contrario, las cosas habrían sido diferentes». GUINDAL, Mariano, *El declive de..., op.cit.*, pp. 162, 168 y 163, respectivamente. Tesis esbozada unos años antes por el propio Alfonso Guerra tras entrevistarse con el Director General del CESID Javier Calderón, un 18 de marzo de 1981. Por un lado, hablaba de las *implicaciones políticas* en donde aparecía «la vinculación de Luis María Ansón, se hallan de un modo u otro Calvo Serer y Emilio Romero, en el terreno ideológico»; segundo las *empresariales*: «Es segura la vinculación a la operación ‘Armada’ de Ferrer Salat y [José Antonio] Segurado de la CEOE, los cuales, al parecer, han ayudado a su financiación». Un apoyo económico que vendría de la mano del Banco Santander y también del Banco Bilbao «pero que fue desmontada por la dirección del Banco» en este último caso Y tras apuntar a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, señalaba el tercer pilar: el poder eclesiástico: «Aunque no existen pruebas, creen que su actitud fue muy dudosa, por lo que suponen que debían de tener algún conocimiento anterior». GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo..., op.cit.*, pp. 393 y 394, y siguientes.

²⁶⁶ AHFPI, PSOE-CEF, “Los problemas de la democracia. Informe de la CEF”, Madrid, abril de 1981, sig. Fc 598, pp. 2-3.

invertebración” de la sociedad española; la “crisis económica muy grave”; y, el “terrorismo y la violencia”²⁶⁷.

Sin embargo, lo dicho no era obstáculo alguno para remarcar en la segunda parte del informe que aquella situación histórica, seguía siendo el *mejor* de los marcos posibles para avanzar en la construcción del marco democrático. Se afirmaba que “[h]ay razones para un optimismo «histórico»”. En tanto “por vez primera en su historia, España se sitúa entre las sociedades industriales de Occidente; ideológica y socialmente, está menos tensa que nunca [...]; los partidos del arco parlamentario han manifestado una unión en la defensa de la democracia simbolizada en las manifestaciones conjuntas del 27 de febrero [1981]”²⁶⁸. De esta forma, correspondía a los socialistas evitar, primero, mostrar cualquier signo de “confusión [...] ante la opinión pública”, y segundo, volver a la política de consenso tantas veces denostada en base a asegurar un *gobierno fuerte y una política firme*²⁶⁹. No había más remedio. Y ahí, el PSOE tenía mucho que decir y que ofrecer:

«Hoy día, el PSOE se halla más unido probablemente que en cualquier otro momento de su historia, más capaz que nunca de combinar eficazmente su papel como organización política principal para defender la democracia y su papel como instrumento principal para defender la igualdad. De esta forma, el Comité Federal del Partido Socialista, máximo órgano entre congreso y congreso, en su reunión celebrada los días 28 de febrero y 1 de marzo, apoyó por unanimidad la oferta de participar en la constitución de un Gobierno con amplia mayoría parlamentaria y extenso apoyo social, debido al riesgo vivido por las instituciones democráticas»²⁷⁰.

La solución provisional planteada sería, pues, la disposición a entrar en un gobierno de coalición²⁷¹. Gobierno de unidad nacional en base a un conjunto de puntos en común: la política interior, la definición de un modelo de estado autonómico, la política internacional y un conjunto de posibles acuerdos socioeconómicos mínimos. Lo anterior, en todo caso, se

²⁶⁷ AHFPI, PSOE-CEF, “Los problemas de la democracia. Informe de la CEF”, Madrid, abril de 1981, sig. Fc 598, pp. 4-5

²⁶⁸ AHFPI, PSOE-CEF, “Los problemas de la democracia. Informe de la CEF”, Madrid, abril de 1981, sig. Fc 598, pp. s/p.

²⁶⁹ AHFPI, PSOE-CEF, “Los problemas de la democracia. Informe de la CEF”, Madrid, abril de 1981, sig. Fc 598, pp. s/p.

²⁷⁰ AHFPI, PSOE-CEF, “Los problemas de la democracia. Informe de la CEF”, Madrid, abril de 1981, sig. Fc p. 598, pp. s/p.

²⁷¹ La primera formulación de esta *política de consenso* puede verse en, AHFFLC, Fondo Saavedra, UGT-CEC, Secretaría Confederal, “Resolución del Comité Federal PSOE”, Madrid, 29 de febrero y 1 de marzo de 1983, sig. AI-14-04. Una resolución en la que podía leerse: «Considera [el PSOE] que, ante el riesgo vivido por las Instituciones democráticas, España necesita que se forme un Gobierno con amplia mayoría parlamentaria y extenso apoyo social, ya que sólo un Gobierno de estas características podrá culminar con firmeza el proyecto democrático previsto en la Constitución, afrontando eficazmente los principales problemas de España [...]. Para ello, el Comité Federal reitera el ofrecimiento hecho por el Partido Socialista Obrero Español al partido del Gobierno y otras fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados para acordar un programa de acción gubernamental y un compromiso de plazos para su realización». Posteriormente, y volviendo al documento *Los Problemas de la democracia* se presentaba un amplio paquete de medidas en donde ahora los socialistas estaban dispuestos a pactar acuerdos sin renunciar, de entrada, a su propio programa: lucha contra el paro, lucha contra la inflación, reestructuración de las actividades productivas, reducción de las desigualdades sociales y culturales o la creación de un marco adecuado para las relaciones industriales. Véase el epígrafe “IV. Socio-económica” en, AHFPI, PSOE-CEF, “Los problemas de la democracia. Informe de la CEF”, Madrid, abril de 1981, sig. Fc 598, p. 2, en donde tras desglosar los posibles puntos de acuerdos y objetivos se afirmaba: «La consecución de dichos objetivos sólo puede realizarse en un marco de sacrificios colectivos justamente repartidos y solidariamente asumidos» (pp. s/p.)

constituía más que en una respuesta política firme a medio plazo en una *huída* hacia delante, sin antes haberse preguntando por las otras consecuencias del propio 23-F²⁷².

El nuevo gobierno de UCD bajo la batuta de Calvo-Sotelo no estuvo por la labor, en momento alguno, de formar un gobierno de unidad o de concentración nacional. Pero esta política tendría una virtud a corto plazo: permitía continuar con la estrategia de responsabilidad con el país diseñada por el PSOE, transmitiendo a su vez la imagen de ser la necesaria garantía para la estabilidad y continuidad de la democracia²⁷³. De todas formas, no se ocultaba ya el deseo de alcanzar el poder incluso antes de la celebración de las elecciones, por más que la retórica demagógica del PSOE se hiciera presente a la menor ocasión²⁷⁴. Incluso si para ello se tuviera que recurrir a la mención de la temida guerra civil²⁷⁵. Así pues, y a pesar de la negativa

²⁷² Lo cierto es que la gran pregunta política y estratégica en aquellos momentos, más allá de propuestas gubernamentales, la formularía dentro del socialismo Nicolás Redondo en nombre de la CEC de la UGT: «¿Se puede decir que el golpe de Estado ha fracasado en su totalidad?». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría Confederal, “Circular nº 29”, Madrid, 13 de marzo de 1981, sig. 002287-006, p. 2. Se decía allí a continuación: «En este sentido, creo que es necesario decir que el intento de golpe de Estado puede representar un retroceso significativo en la consolidación de la democracia en nuestro país, al mismo tiempo que puede propiciar o favorecer una autolimitación en las decisiones políticas. En definitiva, ha creado las condiciones para una democracia autolimitada o tutelada» (p. 2). Y en lo que respecta a la negativa de la UCD a formar un gobierno de concentración nacional iba, de nuevo, un paso más allá del análisis de los propios socialistas: «[S]in embargo, es necesario señalar que el rechazo de la proposición del PSOE, no han estado al margen determinados poderes fácticos de este país que se opondrían a la entrada de este Partido en el Gobierno, por lo que éste representaba de avance democrático y de salida a la actual situación. En este sentido ya conocéis cual ha sido la oposición de la CEOE; con toda la seguridad de las Fuerzas Armadas también se han opuesto y probablemente la Iglesia» (p. 4). Véase asimismo: AHFFLC, Fondo Saavedra, UGT-CEC, Secretaría Confederal, “Informe que presenta a la C[omisión]. Ejecutiva Confederal al Comité Confederal Extraordinario”, Madrid, 27 de marzo de 1981, sig. AI-1404. Extenso informe en donde se analizan los *pros* y *contras* de un posible gobierno de coalición. Un documento que se encuadra en una situación interna dominada por *descontento*, el *desaliento* así como el *desconcierto* como ha remarcado Rubén Vega. De hecho, se dan situaciones como las que se describe a continuación: «La conmoción provocada por la sonada golpista llevó a la Ejecutiva Confederal de la UGT a desplegar un calendario de visitas a provincias con el fin de explicar lo sucedido y ofrecer orientaciones respecto a la línea a seguir, procurando de este modo ‘normalizar la Organización definitivamente, aunque ello no sea óbice para estudiar conjuntamente las imprescindibles medidas mínimas de seguridad’. En casos extremos han llegado a producirse dimisiones y bajas fruto del miedo». VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, *op.cit.*, p. 108.

²⁷³ «Ello no es más que la expresión de la doble vocación histórica del PSOE, como principal organización política que garantiza la democracia en España y como principal instrumento político para luchar por la igualdad en nuestra democracia». AHFPI, PSOE-CEF, “Los problemas de la democracia. Informe de la CEF”, Madrid, abril de 1981, sig. Fc 598, p. 2.

²⁷⁴ «[Y]o vengo insistiendo que para mí como responsable político del partido socialista, es mucho más importante el que se celebren elecciones que saber quién va a ganarlas». AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Institucional, “Intervención de Felipe González en la clausura del Congreso de Badajoz”, Badajoz, 25 de mayo de 1981, sig. 002291-002, p. 2.

²⁷⁵ «Yo les quiero decir a los veteranos y creo que lo van a entender, que si hay una aspiración que siento honestamente en estos momentos, es que la amenaza del terrorismo de todo signo, la amenaza de actitudes golpistas, ha hecho que cada uno de nosotros y todos los ciudadanos de España, teman esa espiral de violencia, y si hay algo que siento profundamente, digo como la primera obligación, y el primer objetivo que me impondría a mí mismo, como responsable, y que creo que debería ser el objetivo del Partido, esa prioridad por encima de todas, sería evitar que España conociera de nuevo un enfrentamiento entre españoles, que conociera de nuevo una Guerra Civil, que conociera de nuevo la terrible experiencia de que unos maten a otros dentro de su propia familia». AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Institucional, “Intervención de Felipe González en la clausura del Congreso de Badajoz”, Badajoz, 25 de mayo de 1981, sig. 002291-002, p. 2.

de Calvo-Sotelo a formar un Gobierno de concentración nacional, se iniciaría una amplia política de pactos en aquellos ámbitos centrales para la estabilidad del país²⁷⁶.

“¿Qué ocurre por tanto, en nuestro país?” se preguntaba retóricamente el propio Felipe González a los dos meses del 23-F en pleno mitin. Evidente. Se estaba ante una democracia “frágil” y al enfrente un gobierno “débil” con una “grave crisis de autoridad, de autoridad moral”, en otras palabras. La solución: “[h]ace falta un Gobierno fuerte [...] que tenga voluntad política para llevar adelante el programa que tenga entre manos”. Y esto no podía ser de otra manera que a través de un “Gobierno de amplia mayoría parlamentaria”²⁷⁷. El asunto no terminaba ahí, pues cualquier posible solución, ya fuera desde la oposición o dentro de un improbable Gobierno de unidad, dificultaba la posibilidad de poner en marcha el programa socialista llamado a ser la solución de todos los problemas del país. Siendo esto así en “términos dialecticos” la “táctica y la estrategia” a seguir pasaba por la convocatoria de elecciones. Una *feliz conclusión* tantas veces repetida. De no hacerlo la propia UCD era la que se estaba engañando a sí misma:

«Por tanto si hay alguien que tiene la tentación de jugar con el anticipo electoral, que yo no temo electoralmente, sino todo lo contrario, creo que si hubiera elecciones mañana o pasado mañana, el Gobierno perdería estrepitosamente estas elecciones y no queda nadie para ganarlas, si no es el Partido Socialista, por tanto no lo temo por los resultados del Partido, lo temo por el vacío de poder que pueda crear, si estamos pensando en eso, yo quiero decir con toda sinceridad, compañeros, que no nos están engañando, se están engañando a ellos mismos, si están pensando en quebrar lo que debería ser la realización de su programa [...] están engañándose ellos, engañando al país con ello, y poniendo en peligro a la democracia»²⁷⁸.

El ejemplo más evidente no era otro que las dificultades existentes para llegar a acuerdos con el fin de solucionar en la medida de lo posible la “crisis económica”. Ante la falta de acuerdos no se perdía oportunidad de atacar a la *fracasada* política liberal del Gobierno de la UCD:

«[M]e temo que el Gobierno que está haciendo una política neo-liberal que ha dado sus frutos negativos, y ha fracasado, por ejemplo en Inglaterra. Y aquí está siendo la situación mucho peor que la inglesa. Y esa política neo-liberal, de sálvese el que pueda, no sólo está creando un millón setecientos o un millón ochocientos mil parados, está creando una situación [...] gravísima para su recuperación»²⁷⁹.

Por enésima vez, la solución pasaba de cualquier de las formas por la victoria socialista. El futuro y definitivo cierre de la política de consenso era cuestión de tiempo. Dicho esto se

²⁷⁶ Diversos fueron los ámbitos en los que se firmaron finalmente acuerdos o pactos: Ley de Defensa de la Democracia, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico o en el aspecto socio-laboral, el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE). Sobre esta última cuestión nos detendremos de forma específica en el apartado “9.3.2.1. El Acuerdo Nacional de Empleo: a *vueltas con el secretismo* en torno a la contratación temporal (enero/febrero 1981-junio 1981)”.

²⁷⁷ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Intervención de Felipe González en la clausura del Congreso de Badajoz”, Badajoz, 25 de mayo de 1981, sig. 002291-002, pp. 3-6.

²⁷⁸ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Intervención de Felipe González en la clausura del Congreso de Badajoz”, Badajoz, 25 de mayo de 1981, sig. 002291-002, p. 8

²⁷⁹ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Intervención de Felipe González en la clausura del Congreso de Badajoz”, Badajoz, 25 de mayo de 1981, sig. 002291-002, p. 9. Ahora bien dicho esto, se asumía con no pocos titubeos ante un público militante y entregado que el programa socialista de Gobierno tendría que efectuarse dentro de las reglas del mercado: «Algunos preguntan que si no nosotros aceptamos la economía de mercado [...]. Yo siempre he dicho, que cuando se encuentre otro sistema mejor, desde luego estaremos por otro sistema. Pero a veces hay críticas muy interesantes del sistema capitalista. Se dice que la economía de mercado sólo tiene un defecto, no tiene conciencia social porque no puede tenerla. Es más eficaz que la economía de Rusia, o que la economía polaca, sin duda alguna. Pero no tiene conciencia social. A las reglas del mercado les da igual que haya millón y medio de parados que dos millones de parados. Pero al responsable político no le puede dar igual» (p. 9).

avisaban de los riesgos. Y estos no eran otros de que muy probablemente el propio PSOE debería renunciar a su programa en pos de consolidar la democracia, aunque asegurando que más allá de lo que sucediera nunca se renunciarían a las convicciones socialistas:

«A partir de aquí compañeros, quiero despedirme con pocas palabras. El Partido Socialista está viviendo en una coyuntura histórica difícil, muy difícil, en una coyuntura que a veces obliga a hacer renunciamentos de programa para llegar a compromisos con otros. Esa puede ser la grandeza y la debilidad de la defensa de un sistema democrático. Pero yo quiero que nadie se llame a engaño. Las convicciones socialistas no van a cambiar, las aspiraciones y los ideales no van a cambiar»²⁸⁰.

Muy poco tiempo después, el PSOE valoraría esta política de concertación como “un camino insatisfactorio”, que además había llevado a producir “graves errores en la atribución de responsabilidades políticas”²⁸¹. Se volvían a cometer los mismos errores de un pasado reciente, que, una vez más, impedían diferenciarse electoralmente de su adversario central.

El estallido del escándalo del aceite de colza –primavera/verano de 1981– o el frontal rechazo a la entrada en la OTAN –otoño/invierno–²⁸², actuaron como auténticos revulsivos en la reactivación de la estrategia política de oposición del PSOE. Nuevamente se iniciaba un “lenguaje de dura descalificación del gobierno”²⁸³. De esta forma, se trató de contrarrestar la imagen ofrecida en los meses anteriores.

En plena ofensiva por recuperar su imagen *del cambio necesario*, y de presentarse como la única alternativa posible para la consolidación de la democracia, el PSOE publicaba pocos meses antes de su XXIX Congreso un documento titulado: “El PSOE ante la situación política”²⁸⁴. Avalado, continuado y profundizado posteriormente en una reunión de la CEF del PSOE al mes siguiente²⁸⁵.

Nos encontramos en el verano de 1981. Tras avisar de los riesgos de una posible involución a nivel político se recordaba, por enésima vez, que la “transición de la dictadura a la democracia no ha concluido” y lo que no era menos importante en aquellas circunstancias: “la democracia es débil y debe ser apoyada y fortalecida hasta que las amenazas que pesan sobre

²⁸⁰ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Intervención de Felipe González en la clausura del Congreso de Badajoz”, Badajoz, 25 de mayo de 1981, sig. 002291-002, p. 14. Y se añadía más adelante: «Estamos firmemente convencidos, de que hay que recorrer este camino, y al mismo tiempo estamos convencidos, de que ese camino no se recorrerá sin democracia, sin libertad, y por consiguiente haremos todo el esfuerzo que sea necesario, para defender esa libertad, y esa democracia, que es el único camino para el socialismo» (p. 14)

²⁸¹ AHFPI, PSOE, “El PSOE ante la situación política”, Madrid, junio de 1981, sig. Fc 390, p. 3. Se concluía con respecto a la política de pactos: «Las negociaciones se desarrollan, además, en un ambiente de confusión, sin límites precisos de temas y de tiempos de realización [...]. Los resultados, además, son hasta el momento escasos» (p. 3).

²⁸² «Lo he dicho varias veces, lo voy a decir hoy, con la misma seriedad y sin gritar. Nosotros estamos en contra de que España se integre en la OTAN. En contra de que integre en la OTAN, y por consiguiente lo digo desde la más profunda convicción». AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Intervención de Felipe González en la clausura del Congreso de Badajoz”, Badajoz, 25 de mayo de 1981, sig. 002291-002, p. 11.

²⁸³ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 574.

²⁸⁴ AHFPI, PSOE, “El PSOE ante la situación política”, Madrid, 15 junio de 1981, sig. Fc 390. Véase aquí la positiva lectura, no exenta de críticas en todo caso, que se realizaría del mismo en, Editorial, “El PSOE, ante la situación política”, *El País*, 20 de junio de 1981.

²⁸⁵ AHFPI, PSOE-CEF, “Informe de gestión presentado al Comité Federal por la Comisión Ejecutiva Federal. Madrid, 11-12 de julio de 1981”, Madrid, 1981, sig. Fc 3980.

ellas sean desterradas definitivamente”²⁸⁶. A nivel social y ciudadano se detectaba un “clima de confusión, preocupación y alarma”, a lo que se sumaba un creciente “desencanto por la falta de soluciones eficaces y un peligroso fatalismo en el ánimo de los responsables políticos y sectores de la ciudadanía”²⁸⁷.

Pero el *verdadero* motivo de aquel documento era bien otro. Por un lado, en el mismo se desarrollaban los principales argumentos con los que se trataba de contrarrestar la imagen ofrecida en los meses en los que la concertación fue el eje de su actividad, al mismo tiempo, que presentaba los ejes de su futuro programa de gobierno²⁸⁸. Por otro lado, como primer y principal preocupación, se volvía a insistir en la necesidad de consolidar la democracia como prioridad absoluta, llevando a su vez una sutil identificación entre el *socialismo* y *democracia*:

«Los partidos españoles y el Partido Socialista en particular tienen que volver a asumir en estos momentos la prioridad de la lucha por la democracia, lucha que el Partido Socialista considera que constituye el único fundamento posible para poder defender históricamente los intereses de los trabajadores y de los sectores menos favorecidos de la sociedad española»²⁸⁹.

Una identificación que venía de atrás y que tendría su correlato en uno de los eslóganes que el PSOE difundiría en adelante: “No hay socialismo sin democracia”, en tanto “[e]l socialismo supone la concepción plena de la democracia, ya que a la libertad se une la igualdad”. Se concluía afirmando –como no podía ser de otra forma– como “[l]os socialistas estamos dispuestos como en otras ocasiones, a realizar el esfuerzo y el sacrificio de renunciar temporalmente [...] a favor de una política capaz de democratizar y modernizar el Estado y la sociedad”²⁹⁰.

A pesar de estos contratiempos, la particular transición del socialismo entraba en su recta final, con la adopción de unas nuevas formas de entender y de hacer política, caracterizada ante todo por una “ideología de moderado reformismo simbolizada en el silencio sobre las etapas de transición al socialismo y la exclusión de referencias a un modelo alternativo”²⁹¹. Muestra de ello sería el XXIX del PSOE celebrado los días 21 al 24 de octubre de 1981. A buen seguro, el más relevante de cara a internarse en la conversión definitiva del PSOE como el *partido de la modernización*.

Un congreso que se afrontó con unas perspectivas muy diferentes a los dos anteriores. Por partes. A *nivel interno*, la crisis del XXVIII Congreso extraordinario por la cuestión del marxismo se había superado, finalmente, sin grandes traumas para la dirección socialista²⁹². El

²⁸⁶ AHFPI, PSOE, “El PSOE ante la situación política”, Madrid, 15 junio de 1981, sig. Fc 390, p. 2.

²⁸⁷ AHFPI, PSOE, “El PSOE ante la situación política”, Madrid, 15 junio de 1981, sig. Fc 390, p. 2.

²⁸⁸ A saber: la democratización definitiva del Estado, la defensa de las libertades y de la seguridad ciudadana, la modernización de la sociedad, la superación de la crisis económica, la definición clara de un proyecto de política exterior coherente... AHFPI, PSOE, “El PSOE ante la situación política”, Madrid, 15 junio de 1981, sig. Fc 390, pp. 3-4.

²⁸⁹ AHFPI, PSOE, “El PSOE ante la situación política”, Madrid, 15 junio de 1981, sig. Fc 390, p. 3.

²⁹⁰ AHFPI, PSOE, “El PSOE ante la situación política”, Madrid, 15 junio de 1981, sig. Fc 390, p. 5.

²⁹¹ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, op.cit., p. 547.

²⁹² Escasas fueron las referencias a lo acaecido dos años antes: apenas unas pequeñas líneas en el *Informe de Gestión* de la CEF del PSOE. Reconocía el propio Felipe González que a nivel interno la situación había evolucionado y mostraba su «gratitud porque las relaciones de compañerismo han ido mejorando progresivamente desde 1979». Añadiendo que la organización «debió atender por tanto, al relanzamiento de la vida normal del Partido, al acoplamiento del nuevo equipo y su coordinación funcional según las nuevas existencias estatutarias del XXVIII Congreso». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria.

fortalecimiento de Felipe González como Secretario General y de Alfonso Guerra como número dos era una realidad y un factor electoral clave. El efectivo control de la organización del propio Guerra y Carmen García Bloise se evidenció al principio del encuentro con la aprobación del *informe de gestión* por el 99,6% de los delegados, así como por la ausencia de críticas significativas antes y durante el Congreso²⁹³. Por cierto en el mismo balance de la gestión se apuntaría como un claro triunfo la “estrategia de la responsabilidad” mantenida desde el frustrado Golpe de Estado. Exhibiendo, a su vez, como un importante acierto la política de movilización a favor del referéndum sobre la OTAN²⁹⁴. En conclusión, “[e]l PSOE se había modernizado y en los partidos modernos, los congresos ratifican las decisiones tomadas por las coaliciones dirigentes, reducida en el caso del socialismo español de 1981 a la especie de comisión permanente que se propuso”²⁹⁵.

Un XXIX Congreso que, ahora sí, marcaría una dirección y un objetivo claros: la transformación del capitalismo solo sería posible a través de las vías democráticas y para ello,

«[l]a estrategia política de los socialistas para los años 80 ha de ser la consecuencia de una valoración conjunta de los objetivos finales a conseguir y de los datos concretos en que hemos de desarrollar nuestra acción política [...]. El PSOE elabora su estrategia y su táctica política coordinando en todo momento, la permanente afirmación de sus objetivos finales – transformación radical de la sociedad capitalista en una sociedad socialista– con las posibilidades reales de actuación en un momento concreto, habida cuenta de las circunstancias objetivas y de los momentos subjetivos existentes en el proceso de toma progresiva de conciencia de clase. Ideología y táctica, proyecto de sociedad socialista y margen de maniobra política, meta final y metas intermedias en el proceso de construcción del socialismo son, pues, los pilares sobre los que se basa el presente proyecto de resolución política»²⁹⁶.

Informe de Gestión. 29º Congreso”, Madrid, 1981, sig. Fc 246, pp. 6-7. Véase asimismo, AHFPI, PSOE, “Estatutos y reglamento del Congreso”, Madrid, 1981, sig. Fa 1297.

²⁹³ Más allá del altísimo ‘grado de consenso’ a la hora de apoyar el *informe de gestión* de la ejecutiva saliente, escasas fueron las ‘intervenciones disidentes’ con la dirección saliente. Como recogieron los medios de comunicación, a pesar de que existieron algunas intervenciones críticas con respecto a la «tarea desarrollada por las secretarías de organización, que desempeña Carmen García Bloise», se afirmaba también que con respecto al «único tema conflictivo planteado al citado órgano, que fue la propuesta de aceptar la proporcionalidad en la elecciones de los delegados al congreso», el mismo se rechazaría sin mayores sobresaltos. Véase, Noticia, “Aprobada la gestión del equipo de Felipe González con el 99,6% de los votos a favor y un 0,4% de abstenciones”, *El País*, 22 de octubre de 1981. Igualmente las posiciones ‘críticas’ estuvieron en esta ocasión mucho más sosegadas. Por ejemplo, véase, GÓMEZ LLORENTE, Luis, “Los socialistas ante su 29º Congreso”, *El País*, 10 de julio de 1981.

²⁹⁴ La propia situación política no requería llevar a cabo un discurso más radical ni más izquierdista, simplemente se necesitaba una *narrativa política* que los diferenciara de la gestión del Gobierno de Calvo-Sotelo, tal como ha señalado el profesor Santos Juliá. Tal y como por ejemplo puede observarse con respecto a la postura del PSOE en relación a un posible referéndum sobre la permanencia en la OTAN: «Con una campaña que no dejaba espacio para la acusación de antiatlantistas, puesto que el lema central era sencillamente la exigencia de una consulta popular, el PSOE lograba desprenderse de la gris imagen de partido gubernamental y recuperaba su papel como principal partido de la oposición. Colaborando con el gobierno se había mostrado como partido de la alternativa: oponiéndose a él se presentaba como el partido del cambio». JULIÁ, Santos, *Los socialistas en..., op.cit.*, p. 573. Consúltense asimismo, SEBASTIÁN, Pablo, “Todos a la OTAN”, *Leviatán*, nº 5, (1981), pp. 83-85.

²⁹⁵ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en..., op.cit.*, pp. 576-577. Y remataba añadiendo: «Quienes advirtieron entonces que el PSOE se adentraba, con la unanimidad de voto, aclamación de candidatos y control desde la cima, por la misma senda que los partidos de la Tercera Internacional o los del Este de Europa no andaban muy descaminados». *Ibidem*. En su día Richard Gillespie señalaría al respecto que la imagen que transmitió el PSOE era la de «un partido stalinista, con un gran culto de la personalidad, un fuerte aparato de partido, una disciplina interna rígida, una prohibición de las tendencias y la persecución y expulsión de los disidentes». GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido..., op.cit.*, p. 376.

²⁹⁶ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 5.

Muestra de que el PSOE no se auto-etiquetó todavía como un partido reformista o socialdemócrata por miedo a “suscitar sospechas de revisionismo ideológico”²⁹⁷, es el anterior extracto de la *resolución política*. El PSOE procedía de la tradición marxista, y aunque se había refutado con profunda convicción el marxismo en línea con las modernas socialdemocracias europeas, seguía quedando un poso más metafórico que real. ¡Qué menos que una *resolución política* no guardara las formas! A pesar de hablar de “transformación radical de la sociedad capitalista”, “de circunstancias objetivas”, e inclusive de “toma de conciencia de clase”, el camino a seguir quedaba meridianamente trazado.

Después de lo que aconteció tras el derrumbe del socialismo real a partir de 1989 en donde la memoria e ideología del socialismo fue enviada al *basurero de la historia*, se ha vuelto más complicado explicar las diferencias entre un proyecto socialista y un proyecto socialdemócrata²⁹⁸. No es éste un debate que venga a cuento ahora. En todo caso, el partido socialista –o cuando menos una significativa parte de él– desde de esta fecha frontera no dejaría de poner un especial empeño en esta labor que tendría su culmen el *Programa 2000*²⁹⁹. Sin embargo, este apunte aquí reseñado se constituyó en la nada sutil diferencia que marcaba la línea programática entre los documentos del XXXVIII y XXIX del PSOE.

En esta trayectoria, el *partido* asumía por un lado la herencia histórica del socialismo a modo de recuerdo patrimonial del socialismo, desarrollando a su vez un proyecto de gobierno de claro corte socialdemócrata, aunque cada vez más influido por las *tesis liberales* de buena parte de su dirigencia (intelectual y política)³⁰⁰. Ejemplo de ello sería la ambigua redacción de las tesis políticas del Congreso:

«El marco constitucional, sin embargo, no delimita un único modelo de sociedad, sino que caben dentro de él distintas formas de sociedad respetuosas todas ellas con el Estado social y democrático de derecho y con los derechos, libertades y deberes de los ciudadanos, así como con sus garantías»³⁰¹.

Que la aceptación del mercado era un mal menor dadas las circunstancias ya se había asumido por múltiples vías. Lejos de cuestiones de definición e ideología, lo relevante de aquella resolución política no era otra cuestión que marcar la senda hacia la conquista del poder político:

«Para la construcción de una sociedad socialista es preciso conquistar el poder político, para alterar desde él la relación social de fuerzas, y conquistarlo democráticamente, lo que

²⁹⁷ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 321.

²⁹⁸ Un último conjunto de reflexiones en este sentido en, PARAMIO, Ludolfo, *La socialdemocracia...*, *op.cit.*. Otra aportación de interés apegada al terreno de lo que acontecía tanto en el seno del PCE al albur de la propuesta del eurocomunismo como en el PSOE con el debate en torno al marxismo a fines de la década de los setenta, se encuentra en: LAZO, Alfonso, “Socialdemocracia y socialismo: Una polémica inútil”, *Sistema*, nº 29-30, (1979), pp. 149-158.

²⁹⁹ Aunque sobre esta cuestión se volverá tangencialmente en siguientes capítulos, véase lo ya apuntado en el apartado, “2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: entre la historia oficial/militante y la literatura partidista y otros materiales de estudio”. Véase también Capítulo 2, *nota 407*.

³⁰⁰ Al respecto véanse las críticas que desde pronto se plantearon desde el interior de las filas socialistas, acerca de cómo algunos dirigentes del partido estaban asumiendo los postulados neoliberales tan en boga en aquel momento. Véase MUÑOZ, Juan y ROLDÁN, Santiago, “Liberalismo económico y estrategia socialista”, *Leviatán*, nº 5, (1981), pp. 35-45. Se decía allí, entre otras cuestiones, que por ejemplo en relación a la política económica ortodoxa del Gobierno de UCD, el problema devenía en que ese mismo modelo «se lo creen algunas economistas socialistas, que están convencidos de que el mercado y esa apertura exterior desmedida son los elementos clave en la superación de la crisis económica». *Ibidem*, p. 41.

³⁰¹ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 5.

implica que el PSOE debe obtener el apoyo popular suficiente para acceder al Gobierno del Estado mediante la formación de una mayoría parlamentaria»³⁰².

Un acceso al poder impregnado –ahora ya sin ningún tipo de rodeos o subterfugios– con una fuerte *lógica electoralista*:

«Si no cometemos graves errores en el futuro inmediato, ante el país se ha abierto una mayor fuerza y con más confianza que nunca hasta ahora, la posibilidad de que los Socialistas puedan ser el núcleo fundamental de un Gobierno capaz de estabilizar la democracia y de hacer avanzar el proceso»³⁰³.

De ahí que una vez aplazada la construcción del socialismo para cuando las condiciones objetivas y subjetivas así lo posibilitarán, la consolidación de la democracia pasaba a constituirse en la “revolución pendiente” del PSOE³⁰⁴.

Como en otras ocasiones, el eslogan del Congreso elegido era “aclaramiento”: *Raíces para la democracia*, en donde ni la palabra “libertad” ni “socialismo” que habían encabezado anteriores convocatorias congresuales tenían cabida. La palabra más oída entre el 21 al 24 de octubre de 1981 sería la de “progresista” como pretendido sinónimo de “socialismo”. Todo lo cual sería ratificado por el propio Felipe González quien prácticamente hablaba ya como futuro presidente del Gobierno³⁰⁵. En último término, estas cuestiones permitieron al socialismo español, ya sin el riesgo de nuevas disputas internas, justificar el viraje ideológico llevado a cabo desde el Congreso extraordinario.

Por lo demás, de entrada se dejaba muy claro que los socialistas se reafirmaban en “la línea ideológica trazada en 1979 en el Congreso Extraordinario del Partido, cuyos contenidos

³⁰² AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 4.

³⁰³ AHFPI, PSOE-CE, “Memoria. Informe de Gestión. 29º Congreso”, Madrid, 1981, sig. Fc 246, p. 14. Señalaría poco tiempo después el ‘crítico’ Pablo Castellano con respecto a la nueva estrategia socialista lo siguiente: «Hasta hace pocos años se elegía una ejecutiva muy de izquierdas, casi incendiaria, y ahora resulta que los revolucionarios de entonces quieren liquidar el marxismo, la democracia de base, las movilizaciones populares, la lucha contra el Estado, la polémica ideológica y la lucha de clases. Aquí lo que se discute además es otra cosa más seria todavía, y más profunda [...]. Ahora se ha puesto de moda hacer la política mirando encuestas y sondeos, y en sociología moderna electoral no hay ya lucha de clases sino un mercado donde hay que colocar un producto, con lo cual se justifica la permanente abdicación de las ideas». Declaraciones extraídas de, CARABANTES, Andrés, *Balance y futuro...*, *op.cit.*, p. 196.

³⁰⁴ GONZÁLEZ CASANOVA, José A., “La tarea institucional del PSOE”, *Leviatán*, nº 5, (1981), p. 48.

³⁰⁵ La Comisión Ejecutiva a raíz de aquel XXIX Congreso estaría compuesta por: Presidente, Ramón Rubial; Secretario General, Felipe González; Vicesecretario General, Alfonso Guerra; Secretario de Acción Social, Ciriaco de Vicente Martín; Secretario de Imagen, Guillermo Galeote; Secretario de Administración y Finanzas, Emilio Alonso Sarmiento; Secretario de Cultura, José Mª Maravall; Secretario de Estudios y Programas, Joaquín Almunia; Secretaria de Organización, Carmen García Bloise; Secretaria Ejecutiva: María Izquierdo Rojo, José María Benegas, Pedro Bofill, Francisco López Real, José Ángel Fernández Villa, Javier Solana, Luis Fajardo Spínola, Enrique Múgica, Ramón Obiols, Carmen Mestre, Manuel Chaves, Salvador Clotas, Salvador Fernández Moreda, Joan Lerma, Joan Prats y Javier Sáenz de Cosculluela [Datos procedentes de, MARTÍN NAJERA, Aurelio, *Partido Socialista Obrero...*, *op.cit.*, p. 45]. Ahora bien, más allá de los nombres y cargos, aquella nueva ejecutiva también reflejó el ejemplo más consumado de la temprana profesionalización del partido: «de los 25 miembros que la componían, 18 eran diputados y uno, el presidente senador. Eran, además, en su gran mayoría hombres, flanqueados por sólo tres mujeres, una de ellas nueva en la ejecutiva para mostrar que algo se avanzaba en esa dirección; contaba con una destacada presencia de abogados, economistas, profesores de universidad y varios técnicos de la administración del Estado; obreros sólo había dos, uno de ellos, el presidente, más que jubilado, el otro minero, de Asturias». JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 577.

tienen total actualidad”³⁰⁶. En esta misma línea, el PSOE fue consciente de que había cuestiones que eran mejor no tocar. Entre ellas el “Programa Máximo” convertido entonces en una especie de *reliquia* del pasado³⁰⁷. La lección del pasado había sido asimilada completamente.

En cualquier caso, la nueva apuesta socialdemócrata obligó a modificar algunos postulados tradicionales. Quizás el más destacado de todos ellos sería la transformación de una de sus señas de identidad clásica, como había sido el auto-identificarse como el principal representante de la clase trabajadora del país. Se partía de una evidencia: el cambio social desarrollado en la sociedad española había transformado la estructura social de clases³⁰⁸. Y a ello estaba dedicada una parte de la *Resolución Política* en la que se hacía constar la nueva *complejidad social* que iba mucho más allá de la “visión simplista de la sociedad capitalista, dividida en dos únicas clases sociales contrapuestas”. Remarcando, por lo demás, los nuevos patrones de autoconciencia de los trabajadores, pues “[a]islado de su trabajo y sometido al control de un aparato de producción sin rostro, el trabajador pierde conciencia de su solidaridad objetiva con otros miembros de su clase”. Aquello había dado lugar a una *nueva conciencia de clase* en una sociedad cada vez complejizada³⁰⁹.

No quedaba más remedio que redefinir el *análisis de clase* del PSOE³¹⁰. Si se quería conquistar el poder político, esta identificación entre socialismo y clase obrera no sumaba más allá de las fuerzas electorales aglutinadas hasta el momento. Así pues, y aunque el objetivo central del socialismo más redundante que otra cosa seguía siendo el de *enterrar* al sistema capitalista; el sujeto político encargado de tal *misión* no podía seguir siendo en exclusiva una clase obrera que comenzaba a ser observada con ciertos recelos. Había que ampliar el espectro, y abarcar los intereses de la mayor parte de las clases sociales sometidas también al *yugo* de la opresión capitalista.

Por este camino no se encontrarían mayores dificultades más allá de las críticas superficiales y sin fondo provenientes, principal aunque no únicamente, de los delegados *obreros* asistentes a los congresos socialistas, y vinculados en lo básico a la UGT. Emprendido un alejamiento consciente y progresivo con la simple identificación como representante de la

³⁰⁶ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 6.

³⁰⁷ Los objetivos del ‘Programa Máximo’ pasarían a ser un recuerdo patrimonial del PSOE como se ha insistido en más de una ocasión. Con todo aquel *recuerdo patrimonial* aguantarían el *blanco y negro* de los textos congresuales como sucedió en 1979 y sucedería en 1981: «1. El Partido Socialista Obrero Español es la organización política que se dotó, hace cien años, la clase trabajadora española para transformar la sociedad injusta en que vivía y con la finalidad de ‘conseguir la completa abolición de las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes’”, como afirma el Programa Máximo, plenamente vigente. Su historia es parte indisoluble de la historia de España. Sus quebrantos son testimonio del dolor de nuestros pueblos en el pasado. El saber y la experiencia de las generaciones socialistas que lucharon contra la explotación capitalista son también componente esencial de la memoria histórica de nuestra sociedad». AHFFLC, PSOE, “59 Tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE”, Madrid, julio de 1979, sig. 185-21, p. 1 [*subrayado* en el texto original].

³⁰⁸ Remitimos aquí a los trabajos ya apuntados en el apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinarias”.

³⁰⁹ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, pp. 6-7

³¹⁰ Unido a su retórica anticapitalista, el PSOE se presentó a lo largo de la dictadura como la única organización que había sabido interpretar la voluntad de la clase trabajadora. Entre los diversos ejemplos existentes, destacamos el siguiente: «El Partido Socialista Obrero Español interpretando la voluntad de clase trabajadora y la gran parte del pueblo no vinculada a la existencia del Régimen, ha luchado, lucha y luchará por el restablecimiento de un sistema de libertades que permita a la clase trabajadora dar una respuesta más acorde con sus necesidades históricas al sistema capitalista». AHFPI, AE, PSOE-CE, “Informe: «Dossier político. Políticas de Alianzas»”, s/l, 1975, sig. AE-635-33, p. 9.

clase trabajadora, el socialismo ampliaría sin límites sus referentes ideológicos. Sus consecuencias, a nivel organizativo, sería la de apostar por la sectorialización de la organización y abrirse a los nuevos movimientos sociales y a la sociedad civil³¹¹. Propuesta, por cierto, que tantos problemas y debates originaría en la izquierda comunista.

Por tanto, a *nivel político*, el agente de cambio representado por la clase obrera –como de hecho se había advertido ya en el XXVIII Congreso extraordinario³¹²– tendría que compartir su protagonismo con lo que el PSOE definió como el *nuevo bloque social mayoritario* para la conquista del poder político:

«Para potenciar esta alternativa progresista, necesitamos más que nunca un proyecto positivo y viable que sintetice las aspiraciones de amplios sectores sociales, permitiendo su concienciación y movilización frente al sistema, permitiendo, en otras palabras, la actualización del proyecto socialista»³¹³.

La conquista de la hegemonía política necesitaba de nuevos aliados:

«El proyecto socialista será realidad con el apoyo de la gran mayoría o no será. Ante los años 80 para alcanzar el apoyo social mayoritario, el PSOE ha de integrar en un sólido bloque de clases a todos los sectores sociales objetivamente interesados en vivir de otra manera, más justa, más igualitaria, más libre y más solidaria [...]. La hegemonía política del PSOE ha de fundamentarse en la consolidación previa de un bloque social hegemónico en el concierto de las clases sociales españolas»³¹⁴.

Aunque esta idea del *bloque social mayoritario* se concretaría de una forma mucho más clara de cara a las elecciones generales del año siguiente, se iba afinando una operación de gran calado en donde los intelectuales orgánicos del partido pondrían mucho de su parte en reclamar la preponderancia del *sentido de la realidad*³¹⁵. Con esta nueva formulación del *frente de clases*,

³¹¹ Véase, AHFPI, PSOE, “Anexo del acta del 29º Congreso. Política social y movimientos sociales”, Madrid, 1981, Fa 1307. Se concretaba allí, por vez primera, una ampliación del frente de luchas inédito en la historia socialista. Política de acción unitaria que venía, en suma, a abrir la organización por todos los *flancos* que fuera posible. Junto a la búsqueda de nuevos aliados se tuvo también por objeto penetrar en todos los entramados sociales organizados –especialmente en las *asociaciones de vecinos*– que pudieran, en suma, ayudar a reforzar la estrategia allí diseñada.

³¹² AHFPI, PSOE, Secretaría Federal de Formación, “Carpeta del militante. Resumen de la Resolución Política del Congreso Extraordinario”, Madrid, 1979, sig. Fa 186 p. 4. En aquella ocasión, y más allá de la *retórica* de superar la mera visión de clases se seguía manteniendo: «El PSOE debe ser un partido de masas, pues debe ser un auténtico partido del pueblo trabajador, no sólo por su línea de clase, sino también por la adhesión estable y masiva de amplios sectores de la sociedad» (p. 8).

³¹³ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 3.

³¹⁴ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 7.

³¹⁵ TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, p. 71. Entre ellos, sin duda, estaba el autor y obra ahora citados, quien aportaba una infinidad de evidencias empíricas y teóricas para justificar el abandono de la centralidad obrera: «[E]l tema de la hegemonía social de la clase obrera debe ser replanteado con rigor y profundidad si no queremos que pierda toda virtualidad política y acabe encerrando a los partidos de izquierda en el terreno de las nostalgias y las esterilidades». Pero no sólo, pues lo que no dudaba en calificar como la inevitable desradicalización del socialismo debido a la nueva estructura social y a la aparición de una ‘potente’ clase media, conducía a que este mismo proceso no podía interpretarse como un efecto o consecuencia negativa. Antes al contrario debía confiarse en sus *bondades*. Y nada mejor que recurrir a la cita de autoridad oportuna –en este caso la de Robert MICHELS, *Los partidos políticos*, Buenos Aires, Amorrortu, 1969– para concretar lo siguiente: «Así para Michels esta movilidad ascendente de los dirigentes políticos obreros se traducía, la más de las veces, en un palpable aburguesamiento ideológico y proclividad a la acomodación al pacto y a la renuncia a cualquier tipo de radicalismo. Por el contrario para Michels, los dirigentes socialistas de clase media, al

el socialismo concluía un viraje que ya había sido anunciado por el propio Felipe González unos años antes. Viraje en el que, no obstante, el *lenguaje* utilizado parecía proceder de otros tiempos políticos:

«Parece evidente que el concepto de clase trabajadora como antagónica de la clase capitalista no es un concepto que se pueda utilizar en términos simplistas, por qué también hay importantes elementos que dividen a la sociedad no en dos clases antagónicas, sino en una serie de clases que forman una especie de frente ante unas clases que monopolizan o hegemonizan el poder económico, el poder político, y en definitiva todo los poderes, y a esa minoría que se agrupa en torno a los grandes poderes financieros, de la gran industria, etc., sería a la que habría que combatir, probablemente con la incorporación en una larga fase histórica de amplísimos sectores de la población, como el pequeño campesino, el pequeño propietario agrícola, el pequeño propietario industrial, etc.»³¹⁶.

Configurado el proyecto político y buena parte del programa de un futuro gobierno, y reafirmada la estrategia socioeconómica diseñada a principios de la década los ochenta³¹⁷ así como preparada una generación de nuevos cuadros políticos para la toma del poder, a la par que clarificado el frente de alianzas y de clases; la *historia* reclamaba al PSOE que ocupará el lugar que le correspondía.

«Para acometer estas tareas, el PSOE no puede eludir un problema esencial: hacer frente a la situación de fragilidad del régimen democrático. Toda la política del PSOE debe partir de esta consideración: la crisis de la democracia implica serios riesgos para las libertades y, por consiguiente, para el proyecto socialista en cuanto que la esencia del mismo no es otra que extender la democracia a toda la sociedad»³¹⁸.

Desde, al menos, 1978 una fuerte convicción política –cuando no de *tintes religiosos*– se iba a apoderar del núcleo duro de la dirección socialista. Si la derecha política no había llevado a cabo su «misión histórica» consistente en modernizar el país, y, además, existía el riesgo de una clara involución democrática; el socialismo debía asumir un papel histórico, que aunque no le correspondía en un sentido estricto, sería un mal menor si conseguía finalmente situar a España en la senda del progreso al coste que fuera. Por tanto, el PSOE de puertas para adentro pero también para afuera podía presentarse como víctima propiciatoria que sacrificaba el proyecto socialista en pro de la democracia y de la “revolución burguesa” por realizar³¹⁹.

no experimentar esta movilidad social, no eran tan proclives a dicho tipo de cambios». Ibídem, pp. 32 y 16, respectivamente.

³¹⁶ Entrevista con Felipe González en *Zona Abierta*, nº 12, (1977), p. 16. Asimismo véase la entrevista realizada por el entonces director de la Fundación Pablo Iglesias al propio González en, CLAUDÍN, Fernando, “Entrevista con Felipe González”, *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 5-21. Consúltese también: GOMÁRIZ, Enrique, “La sociología de Felipe González”, *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 61-76. Y sobre esta misma cuestión, y especialmente en lo que se refiere a la transmutación de los significados sobre el movimiento obrero y la clase trabajadora, consúltese: CRUZ, Rafael, “El órgano de..., *op.cit.*”.

³¹⁷ Con ligeras variaciones del documento interno presentado meses antes –AHFPI, PSOE, “Estrategia económica del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1411– la denominada *política socio-económica* que se aprobaría en este XXIX Congreso reafirmaría la estrategia definida entre la más alta dirigencia socialista: AHFPI, PSOE, “Anexo del acta del 29º Congreso. Política Socio-económica. Sindicalismo y cooperativismo”, Madrid, 1981, sig. Fa 1306. Documento congresual aprobado en donde ya se hablaba abiertamente de que para la salida a la crisis se deberían realizar una serie de «sacrificios generales [...] que sólo puede ser aceptada desde una posición progresista si su puesta en marcha asegura la consolidación de las posiciones conquistadas en la participación de los trabajadores en la distribución de la renta nacional» (p. 11.).

³¹⁸ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 130, p. 8.

³¹⁹ GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Evolución ideológica del..., *op.cit.*”, p. 71. Tres años antes el mismo autor avisaría de los riesgos implícitos de que una vez en el poder el cumplimiento de la ‘misión histórica’ sustituyera definitivamente al socialismo: «Este tipo de política de democratización del

Como ha afirmado García Santesmases aquella “pudo ser una tesis más o menos correcta desde un punto de vista historiográfico, lo que no cabe duda es que fue una consigna política que caló profundamente en la población”³²⁰.

La misión histórica comenzaba a concretarse *blanco sobre negro*. El “PSOE como el partido de la modernización” se justificaba en tanto que:

«La derecha española no ha sumido su papel histórico, a diferencia de lo ocurrido en los países del mundo occidental [...]. Esta contradicción ha puesto a los partidos de la izquierda y, en concreto, a los socialistas, en una posición distinta al papel histórico que nos correspondería en otra situación, generando un comportamiento político y unos planteamientos no siempre comprendidos suficientemente por los sectores básicos de apoyo a la alternativa de cambio social. El PSOE se ha caracterizado en la presente etapa por el ejercicio de una responsabilidad histórica, cual ha sido la de asumir el papel de núcleo de la estabilidad, a través de la asunción del reto y de la responsabilidad del proyecto histórico de democratización del Estado y de democratización de la sociedad, que la derecha española, en general, se ha negado a realizar de forma rotunda, clara y sin indecisiones»³²¹.

Por tanto, el objetivo final del proyecto socialista proponía “la modernización de la sociedad hacia las cotas de libertad y bienestar de que disfrutaban las democracias más consolidadas”³²². En esta precisa coyuntura tocaba irremediabilmente tensar a la organización en una “estrategia de *mantenimiento* y profundización del quehacer militante en el trabajo social”, que debería estar acompañada por una “imaginativa estrategia de *crecimiento*”. Solucionados los dilemas político-ideológicos, la organización debía convertirse en una “*auténtica escuela de actitudes democráticas*”. Y el requisito para todo lo anterior venía a concretarse en que el “imperativo de modernización sea plenamente asumido y realizado”, lo que venía a traducirse en el “deseo de hacer crecer la organización será algo más que simple voluntarismo”³²³.

La conquista del poder político se acercaba. Incluso, dadas las expectativas generadas, los mismos socialistas prometerían que con la puesta en marcha del proyecto de modernización se alcanzaría la “felicidad de todos los hombres”³²⁴.

Estado, de modernización de la sociedad, no es una política específicamente socialista. Es una política realizada por la burguesía democrática en muchos países europeos [...]. Realizarla no puede ser, sin embargo, confundir los designios coyunturales con los presupuestos ideológicos, estratégicos y políticos del socialismo». id., “Los límites infranqueables...”, *op.cit.*, p. 13. De similar opinión sería Alfonso S. Palomares para quien disipar dudas pondría el *adjetivo* progresista a la hora de trazar la *misión histórica* del PSOE en octubre de 1982: «Felipe González le ponía voz a la promesa de hacer una serie de cambios que era necesario hacer y que los hubiera podido hacer una burguesía progresista, pero los haría el PSOE, porque la burguesía progresista estaba dispuesta a apoyar a los socialistas en las urnas». PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González...*, *op.cit.*, p. 233.

³²⁰ Id., “Evolución ideológica del...”, *op.cit.*, p. 71.

³²¹ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 9

³²² AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 11.

³²³ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 14 [*cursiva* en el texto original].

³²⁴ Tal como expresaba la Resolución Política del XXIX Congreso del PSOE: «El socialismo es un proyecto de construcción de las condiciones sociales que hagan posible la felicidad de todos los hombres [...]». AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 7. Aspecto que el propio Santos Juliá interpretaría de la siguiente forma: «[L]os socialistas comenzaron a soñar por vez primera que estaba al alcance de su mano representar a toda la sociedad durante todo el tiempo». JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, pp. 579-580. Sin embargo la crítica más dura procedería de las propias filas del PSOE a través de Joaquín Leguina: «En alguna ocasión se ha dicho que el socialismo es un proyecto de felicidad para los hombres, a pesar de la ambigüedad de la

Esta especie de *mesianismo* que rodeó a la toma de decisiones del PSOE, se reforzaría con las sucesivas victorias electorales en las elecciones de 1982 así como en las municipales del año siguiente³²⁵. Ejemplo de lo anterior sería la posición mantenida en un *documento de estrategia* del PSOE publicado pocos meses después de su llegada al Gobierno, en el que se remarcaba como “el Partido Socialista es la única fuerza política en condiciones de abordar estas tareas”, en tanto el proyecto socialista quedaba legitimado ya que:

«El pueblo español, pues ha apostado, en todos los ámbitos en que ha sido consultado, por una política de progreso y modernización representada por el socialismo democrático; y ello, a la vez que ha puesto en manos de los socialistas los más importantes resortes de poder institucional, dotándoles así de los medios necesarios para cumplir su misión, ha descargado sobre nosotros una responsabilidad histórica de cuyo cumplimiento, más allá de las vicisitudes políticas, depende en gran medida el futuro de nuestro pueblo»³²⁶.

El proyecto socialista arrancaba de este modo la década de los ochenta con una renovación total de las que habían sido las raíces básicas del PSOE. Tiempo más adelante, Felipe González ya se encargaría de remarcar las vicisitudes de la *adoptada* misión histórica del socialismo, a través de un discurso imbuido cada vez más de una retórica *nacionalista* y *grandilocuente*:

«Yo había tenido siempre, primero, vocación mayoritaria y, segundo, responsabilidad para saber que la tarea que teníamos que hacer no era la tarea clásica de un partido socialdemócrata que se alternaba en el poder como en cualquier país europeo. Teníamos que hacer algo que trascendía la frontera de la alternativa socialdemócrata para asentar un proyecto nacional de una envergadura mayor. Teníamos que hacer, entre otras cosas, un proyecto de modernización y esto no era específicamente un proyecto socialdemócrata»³²⁷.

4.3. Un partido para el poder: la cultura organizativa del socialismo

«Este Partido es realmente cojonudo y el jefe también».

Luis SOLANA, dirigente socialista³²⁸.

«El PSOE debe ser un partido de masas, pues debe ser un auténtico partido del pueblo trabajador, no sólo por la línea de clase, sino también por la adhesión estable y masiva de amplios sectores de la sociedad».

difícil concreción del término felicidad, difícilmente ha de entenderse que quienes se han unido a tan ancho proyecto para los demás no den muestras de convivir entre sí muy felizmente». AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Sindical, Joaquín Leguina, “El discurso socialista en la encrucijada”, Madrid, octubre de 1987, sig. 002906-005, p. 51.

³²⁵ Véanse los datos aportados para tal caso por, DELGADO SOTILLOS, Irene, *El comportamiento electoral municipal español, 1979-1995*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI 1997.

³²⁶ AHFFLC, PSOE-CE, “Documento de estrategia”, Madrid, octubre de 1983, sig. AI-647-08, pp. 6-7. Sobre este importante documento prácticamente único, véase el largo análisis que realizaría sobre el mismo SOTELO, Ignacio, “Perspectiva desde el partido” en id., *Los socialistas en...*, *op.cit.*, pp. 237-264. Todas estas circunstancias reforzarían el ‘mesianismo’ de los dirigentes socialistas e influirían en la forma de Gobernar como señalara en su día el propio Víctor Pérez Díaz, y cuya reflexión abre este mismo capítulo. PÉREZ DÍAZ, Víctor, *España puesta a...*, *op.cit.*, p. 52.

³²⁷ Declaraciones de Felipe González en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, pp. 501-502.

³²⁸ AHFFLC, UGT, *Correspondencia con partidos políticos españoles*, nota manuscrita adjunta en correspondencia de Luis Solana a José Luis Corcuera, el 28 de mayo de 1981, sig. 002275.001. En cuanto a su prolífica trayectoria dentro de la organización socialista durante el franquismo –entre otros cargos, sería responsable de las finanzas socialista– como en tiempos democráticos –Diputado a Cortes, Presidencia de Telefónica (1982-1989)...– véase su página web personal: www.luissolana.com.

PSOE, *Carpeta del militante*³²⁹.

«The essential point is that Socialist class resentment did not translate into opposition to class domination, but was only expressed in the desire to rule, to escape from the dominated class and became part of the dominant class».

James PETRAS, *Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism*³³⁰.

Hasta el momento se ha examinado lo que, a grandes rasgos, puede definirse como la evolución político-ideológica del PSOE, a través de su particular transición. Una *transición* en donde la cultura política y la propia identidad socialista se transformarán radicalmente. Cambios que tendrán notables consecuencias en un futuro inmediato en el seno de una organización, en la práctica reconstruida desde la base misma a mediados de los años setenta

De este modo, y antes de adentrarnos en la etapa previa del acceso al poder, cabe preguntarse por una serie de cuestiones que puedan ayudarnos a explicar, de mejor forma, la base organizativa del socialismo y con ella una forma de hacer política y entender el poder político. Un examen que parte de una primera evidencia: la predominante presencia masculina en el seno de la organización, en tanto el papel de las mujeres militantes y/o dirigentes sería escaso tanto durante el franquismo como ya en tiempos de democracia.

¿Cómo afectaron todas las transformaciones descritas en la fisonomía de un partido político que fue concentrando a marchas aceleradas todos sus esfuerzos en la estrategia electoral? ¿Qué tipo de composición social existía en un partido que se reclamó hasta muy tarde como la vanguardia misma de la clase obrera? ¿Existía alguna similitud entre el *nuevo bloque social mayoritario* pregonado en el XXIX Congreso del PSOE y la militancia de base socialista? ¿Qué clase de cultura militante era características del PSOE a principios de los años ochenta? Y lo que no es menos importante, ¿qué actitudes y qué papel cumplió la militancia en la adopción de la estrategia de la modernización una vez desechada la ideología socialista?

Como hemos visto hasta ahora, por lo menos, se pueden identificar dos rupturas traumáticas en el seno de la familia socialista en este periodo de tiempo; a) la primera motivada por la llegada de lo que hemos denominado la *nueva coalición de poder*. Desavenencia de marcado carácter generacional y estratégico; b) la segunda ruptura más bien parcial es la que se produciría con la crisis que media entre los dos congresos celebrados en 1979. En todo caso, la más dura de las rupturas se produciría en la década de los ochenta con motivo del desencuentro histórico entre el PSOE y la UGT.

Dejando apartadas, por ahora, estas relevantes cuestiones, se asistirá también estos años a la “reunificación” de las dispersas familias socialistas como también se ha dejado apuntado. Todos estos procesos entrelazados tuvieron un impacto notable en la fisonomía organizativa de un partido político en donde los recursos organizativos, humanos y económicos a la altura de 1975, por no retroceder más en el tiempo, eran exigüos. La posterior construcción de la maquinaria electoral en la que se llegaría a convertir el PSOE obedeció, en buena medida, a exitosos factores internos de reorganización, pero cabe destacar como igual de atractivos toda una serie de condicionamientos de oportunidad política, que caracterizaron al periodo de la transición postfranquista y sobre los que la historiografía ha pasado de *puntillas*.

En este sentido, el *renacimiento* ya no sólo político sino organizativo de las siglas socialistas constituye uno de los capítulos más interesantes de este periodo histórico. Las aproximaciones parciales publicadas, junto con la escasa documentación interna del PSOE,

³²⁹ AHFPI, PSOE, Secretaría Federal de Formación, “Carpeta del militante. Resumen de la Resolución Política del Congreso Extraordinario”, Madrid, 1979, sig. Fa 186, p. 9.

³³⁰ PETRAS, James, “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y id. (ed.), *Mediterranean Paradoxes...*, *op.cit.*, p. 96.

pueden, al menos, acercarnos a grandes trazos a la recomposición y consolidación de un modelo organizativo sometido a una férrea disciplina de partido.

El proyecto de partido por el que optó el PSOE es muy representativo de una singular cultura política y de una concepción elitista del poder. El Partido sería mucho más que un partido político al uso: fue parte del poder mismo hasta el punto de que la superposición entre el PSOE y el Gobierno socialista alcanzaría unas dimensiones inéditas en la reciente historia política.

“[E]n un partido [...] la democracia no es un artículo para el consumo interno, sino más bien para la exportación” sería la cita escogida de Robert Michels por quien fuera uno de los ideólogos del PSOE, José María Maravall, para explicar y justificar el asunto³³¹. A la conclusión del XXVIII Congreso extraordinario y ya definitivamente tras el XXIX Congreso socialista, el PSOE se haría depositario de una nueva seña de identidad de la mano de Alfonso Guerra: el fuerte y férreo control interno de la organización. El objetivo fue evitar que cualquier tipo de disensión y/o crítica, procediera de donde procediera, pudiera llegar a dañar, en adelante, la imagen y posibilidades del PSOE en términos electorales³³². Los intentos de *rectificación*, que los hubo, en los siguientes años en nada cambiaron aquel modelo³³³.

Su *historia*, y con ella la *memoria* viva y transmitida entre las diversas generaciones de las familias socialistas, había quedado profundamente marcada por las divisiones, escisiones y enfrentamientos acontecidos antes, durante y tras la Guerra Civil³³⁴. Sin duda aquel conjunto de experiencias constituyeron un importante elemento de cara al reforzamiento del control político-organizativo del partido. Pero este mismo factor no explica por sí mismo, la apuesta decidida por “profesionalizar” la organización incluso antes de la llegada del poder. Interrogante éste que será objeto de atención en las siguientes líneas.

“¿Cuáles son las razones que explican la pujanza y estabilidad de un partido como el PSOE en un país con una historia política reciente tan frágil y mudable?” se interrogaba José Félix Tezanos, el mejor conocedor de la *sociología del socialismo*³³⁵. No era baladí aquella pregunta, pues en pocos años se había pasado de una movilización política, social, cultural de

³³¹ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia..., *op.cit.*, p. 51. La obra citada – recuérdese también manejada en su momento por el propio Tezanos– es MICHELS, Robert, *Political Parties*, New York, Free Press, 1963, p. 7 [traducción al castellano, *Los partidos políticos...*, *op.cit.*].

³³² «Las víctimas serán los activistas críticos. Puede que sólo consigan generar incentivos para que el Gobierno sea un buen agente si su amenaza de escisión interna es creíble y tal escisión supone un grave riesgo electoral. Esto ocurre cuando los disidentes no pueden ser presentados como oportunistas o radicales de las preferencias políticas de los votantes». MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, p. 167.

³³³ Como bien recuerda José Félix Tezanos en 1983 en la ciudad de Madrid se celebraría la Conferencia de Organización y Estatutos con el «objetivo fundamental [de] introducir elementos de flexibilidad en la organización y el funcionamiento del partido, ya que después del XXVIII Congreso se había adoptado un sistema que reforzaba excesivamente el voto de mayorías [...]. En la práctica este sistema dejaba abierto pocos cauces de participación a las minorías». TEZANOS, José Félix, “El PSOE entra en democracia” en id. (coord.), *PSOE 125...*, *op.cit.*, pp. 136-138. No obstante, y lejos de la opinión del autor, aquella *Conferencia* celebrada en plenos momentos de *euforia socialista* en nada o poco cambió la situación inicial, más allá de reconocer las ‘corrientes de opinión’ lo que, en cualquier caso, era un paso considerable. Véanse: AHFPI, PSOE, Secretaría Federal del Área de Organización, “Documentos base [de la] Conferencia Federal de Organización y Estatutos: propuestas y enmiendas”, PSOE, Madrid 1983, sig. Fc 264; AHFPI, PSOE, “Conferencia de Organización y de Estatutos. Madrid, 11, 12 y 13 de marzo”, Madrid, 1983, sig. Fot 637.

³³⁴ Véase asimismo las aportaciones al respecto de, TEZANOS, José Félix, “Continuidad y cambio..., *op.cit.*..

³³⁵ TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*..

dimensiones no conocidas en la historia contemporánea del país, a lo que, primero, se conoció, como la desmovilización social y sindical, y, posteriormente, el *desencanto*³³⁶. El caso del PCE es el más significativo en tanto la sangría de militantes sería una constante desde las elecciones de 1977 hasta la catarsis total de 1982³³⁷. Y, sin embargo, el PSOE, muy al contrario, y a pesar de que el *ciclo de luchas* iniciaba su declive, vería incrementada progresivamente su base militante. Otra cuestión sería su peso político en la toma de decisiones.

Aquí, como ya adelantábamos, deben tenerse presente las circunstancias y características que rodearon la transición. La organización socialista tras el éxito electoral de 1977, y a pesar del parón en cuanto a su crecimiento en número de votos del año setenta y nueve, comenzaría a ser realmente atractiva para un importante núcleo social auto-etiquetado de izquierdas y/o progresista. En relación con lo anterior la aparición de una *nueva clase media* –de tipo intelectual– en mucho ayudó también³³⁸. A esto se sumó un notable trasvase de militantes, y especialmente de cuadros medios-altos formados, desde la organización comunista a la socialista. Junto a ello ha de añadirse el hecho histórico pero también electoral de que buena parte del “voto comunista” terminara parando en el PSOE desde 1977 pero de forma más concreta en 1982³³⁹. Entre las razones de este proceso se debe advertir que el PCE como el “partido del antifranquismo” había aglutinado en su entorno más cercano o próximo a una numerosa militancia antifranquista antes que comunista, que con la clarificación del proceso político y electoral añadido a la desmovilización político-sindical, más pronto o más tarde, o bien darían el paso hacia el PSOE o simplemente abandonarían en tropel la militancia³⁴⁰. No existe estudio fiable y continuado en el tiempo sobre este proceso de trasvase, excepto pequeños

³³⁶ Sobre esta cuestión se volverá en extenso en el Capítulo “9. En nombre de la «modernización»: el mandato de la *flexibilidad* (octubre 1976-febrero 1983)”. Por lo demás, véanse, algunas de las múltiples interpretaciones que se han venido ofreciendo, especialmente a partir de los noventa, acerca de lo que se ha denominado generalmente como el *desencanto*: CUADRA, Bonifacio de la y GALLEGÓ-DÍAZ, Soledad, *Del consenso al desencanto*, Madrid, Saltés, 1981; VILARÓS, Teresa M., *El mono del desencanto: una crítica cultural de la transición española (1973-1993)*, Madrid, Siglo XXI, 1998; y una aguda visión personal en, VIDAL-BENEYTO, José, *Memoria democrática...*, *op.cit.*.

³³⁷ Una referencia clave a pesar del tiempo transcurrido en, VEGA, Pedro y ERROTETA, Peru, *Los herejes del PCE*, Barcelona, Planeta, 1982. Por lo demás, junto al ya clásico libro de, MORÁN, Gregorio, *Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985*, Barcelona, Planeta, 1986, véanse los trabajos contenidos en, BUENO, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (eds.), «*Nosotros, los comunistas*»..., *op.cit.*. Y más recientemente, junto el ya tantas veces citado libro, de ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, *El PCE y...*, *op.cit.*, y por más que el mismo finaliza su recorrido un tiempo antes, TREGLIA, Emanuele, *Fuera de las...*, *op.cit.*. Y un estudio comparativo especialmente útil en, SHARE, Donald, “Two Transitions: Democratization and the Evolution of the Spanish Socialist Left”, *West European Politics*, vol. VIII, nº 1, (1985), pp. 92-103.

³³⁸ Véase las tesis que maneja al respecto, HEYWOOD, Paul, “Mirror-images...”, *op.cit.*, p. 201.

³³⁹ José Félix Tezanos ofrece unos valiosos datos –de los pocos con los que realmente contamos a día de hoy– a partir de una encuesta realizada por la Secretaría de Propaganda del PSOE en enero de 1979 que, reflejaba lo siguiente: a partir de «6.000 entrevistas realizadas en las 50 provincias españolas, se pudo comprobar que un 52,5 por 100 de las personas que pensaban votar por el PCE en 1977 señalaban al PSOE como el partido por el que podrían votar en caso de cambiar de opinión, e igualmente lo señalaban un 39,5 por 100 de los votantes potenciales de UCD». TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, p. 51.

³⁴⁰ Junto con lo citado en la *nota* 337, la sangría de militantes del PCE será histórica en tan sólo poco más de un lustro. Así desde la salida de la clandestinidad a la celebración del IX Congreso en abril de 1978, el Partido había perdido más de 60.000 militantes en poco más de dos años. VEGA, Pedro y ERROTETA, Peru, *Los herejes del...*, *op.cit.*, p. 42. Datos que confirma también, MORÁN, Gregorio, *Miseria y grandeza...*, *op.cit.*, p. 601. Así pues, si para el IX Congreso (abril de 1978) el PCE contaba con 201.740 militantes; para el X Congreso (julio de 1981) el censo se había reducido a 132.069 militantes; y para el XI Congreso (diciembre 1983) el censo todavía se había reducido más, a 84.652 militantes. Datos extraídos de, *Tiempo*, 16 de diciembre de 1983.

datos aislados³⁴¹. Pero los ejemplos personales son numerosos para confirmar parcialmente esta hipótesis de trabajo³⁴². De modo que, si bien no se debe sobrevalorar este proceso en términos cuantitativos, en cambio, sí ha de atender a su valor cualitativo.

Pero el potencial humano del PSOE también se ha de explicar por la siguiente razón: el previsible acceso al poder político fue motivo más que suficiente para que un considerable número de personas dieran el paso de afiliarse al PSOE, tanto por cuestiones estrictamente políticas como por cuestiones profesionales. En todo caso, y como nota general, tanto la afiliación a los partidos políticos como a los sindicatos y los diversos movimientos sociales ha sido especialmente baja en España tras el fin de la dictadura³⁴³. La debilidad de la sociedad civil como herencia del franquismo constituye una de las notas más destacadas del periodo democrático.

Los datos disponibles sobre el número de afiliados –término que, en ningún caso puede ni debe confundirse con el de *militantes*– confirman, por lo menos, la primera de las hipótesis lanzadas: el espectacular crecimiento cuantitativo de la afiliación socialista. En el conocido como Congreso de Suresnes el PSOE apenas contaba con 2.500 –a los que había que sumar cerca de otros 1.000 militantes en el exilio– afiliados, cifra que se vería reducida en alrededor de un centenar a la altura del XXVII Congreso del PSOE en 1976. Ahora bien, en tan sólo un año tras las primeras elecciones generales de 1977 esta cifra aumentaría hasta 51.552 afiliados. Cifra que se doblaría antes de las elecciones de 1982: 112.591 afiliados³⁴⁴. Entre

³⁴¹ Nuevamente los datos aportados por el sociólogo socialista son de enorme utilidad. En relación a los tres congresos socialistas que se celebran entre 1979 y 1981, planteaba un conjunto de cuestiones de interés a partir de las encuestas realizadas a los delegados asistentes. Veamos algunas. Primero, con respecto al bloque de militantes que procedían de otro partido político o fuerza sindical o directamente venían de otros partidos que se unificaron con el PSOE, se señalaba lo siguiente: «un 40 por 100 de estos delegados en la encuesta de mayo de 1979, un 41,2 por 100 en la de septiembre y 33,2 por 100 en la de 1981». Por otro lado, en relación al Congreso extraordinario se ofrecían los siguientes datos: «el mayor contingente corresponde al PCE y CCOO (13 por 100), seguidos por los que pertenecieron a otros partidos de extrema izquierda (8,3 por 100), partidos de centro y derecha (4,7 por 100), FLP (“Felipe”; 2,4 por 100), extrema derecha (1,2 por 100)». Por último, para el Congreso de mil novecientos ochenta y uno los ex-militantes del PCE –incluidos aquí también los de CCOO– que se habían afiliado al PSOE representaban el 10,5% de los delegados». Datos extraídos de, TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, op.cit., p. 147.

³⁴² Por ejemplo, quienes llegaron a ser ministros socialistas y que a su vez respondían a dos generaciones de militantes comunistas: Jorge SEMPRÚN –*Federico Sánchez se...*, op.cit.– y Jordi SOLÉ TURA –*Una història optimista. Memòries*, Barcelona, Edicions 62, 1999–.

³⁴³ Aunque se carecen de estudios significativos, el estudio de Leonardo Morlino para principios de los años noventa calculaba que tan sólo un 2% del electorado se encontraba afiliado a algún partido político en España. Cifras similares con Gran Bretaña (3,3%) o Alemania (4,5%), pero muy alejadas de países como Finlandia (12,9%) o Austria (21,8%). Véase, MORLINO, Leonardo, *Which democracies in Southern Europe?* Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1996; y, id., *Democracies y democratizaciones*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009. De hecho, en el varias veces citado estudio de José Félix Tezanos se afirmaba: «[E]l actual nivel de afiliación al PSOE [1982] debe considerarse como más bien bajo, siendo en concreto la *ratio* votantes/afiliados del PSOE una de las más bajas de todos los partidos importantes de la Internacional Socialista». TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, op.cit., p. 92. Véase asimismo la *Tabla 5.2*, “Niveles de afiliación y voto en distintos partidos socialistas europeos”. *Ibidem*, p. 93.

³⁴⁴ En el *Libro del militante* que publicaría la organización a principios de la década de los ochenta, y en base al censo que presenta, se da una cifra para julio de 1982 de 105.119 afiliados. Lo que, en todo caso, no es óbice para que tan sólo entre julio a octubre de aquel año aumentará la militancia en cerca de 7.000 nuevos afiliados. De hecho, entre julio de 1982 a mayo de 1983 se alcanzarían las 129.182 fichas a las que debían sumarse otras 2.150 de las Federaciones del Exterior [datos extraídos de, PSOE, *Libro del militante*, Madrid, PSOE, 1983, p. 94]. Igualmente, José M^a Maravall ha señalado como desde abril de 1977 a 1979 se pasaría de 150 agrupaciones a 2.618 según datos de la propia Secretaría de Organización del PSOE para el primer veintiocho congreso [MARAVALL, José M^a, “La alternativa socialista...

medias de estas fechas claves para la historia del socialismo, en 1979 el total de afiliados era 101.082 descendiendo hasta el XXIX Congreso a 99.385³⁴⁵. Asimismo en esta entrada masiva, como previamente se ha advertido, las mujeres representarán tan sólo un pequeño porcentaje de la nueva afiliación en un partido, además, con una edad media ciertamente elevada³⁴⁶. Situación esta que se mantendrá en la siguiente década³⁴⁷. Posteriormente, y ya bajo los gobiernos socialistas, el PSOE alcanzaría a principios de la siguiente década los 262.000 afiliados³⁴⁸.

Veamos otro dato clave de tipo aproximativo. Ejemplo de lo que aquí estamos diciendo es que para el primer XXVIII Congreso del PSOE más del 70% de los delegados llevaban menos de cuatro años afiliados³⁴⁹. Así pues, a la altura de 1977 el PSOE “[e]n la práctica, era un partido nuevo, que en pocos años tuvo que construir una organización y simultáneamente participar en las elecciones y acontecimientos que tenían lugar en el proceso de transición a la democracia”³⁵⁰.

En este contexto, el PSOE pronto tendría que hacer frente a numerosos desafíos electorales, y lo que es más importante, necesitaría recursos humanos formados y preparados para asumir una ingente cantidad de cargos electos, junto con los puestos técnicos, y todo ello sin descuidar las *riendas* de la organización socialista. Aquí aparece, de nuevo, una más de las

op.cit., p. 26]. De notabilísimo interés, en este caso, es el informe interno del PSOE promovido por el Grupo de Estudios Sociológicos un par de años antes: AHFPI, Secretaria Federal de Organización, “Informe de urgencia sobre las perspectivas de crecimiento de la afiliación del PSOE [estudio sociológico de extensión]”, Madrid, Grupo Federal de Estudios Sociológicos / Secretaria Federal de Organización del PSOE, 1981, sig. Fc 3810.

³⁴⁵ De nuevo el *Libro del militante* ofrece para esa fecha otra cifra similar pero diferente: 95.206 afiliados. PSOE, *Libro del militante...*, *op.cit.*, p. 94.

³⁴⁶ En concreto, para 1980 tan sólo un 9,7% de la afiliación total. De la misma forma, «las edades medias de las mujeres al PSOE son más bajas que las de los hombres, de la misma manera que también tienen unos mayores niveles de estudios». A lo que debía sumarse que «una buena parte de las mujeres actualmente afiliadas al PSOE acompañaban a su afiliación un alto grado de implicación familiar en el partido [...] ¡un 72 por 100 señala que sus maridos pertenecen al PSOE! Es decir, que lo que estos datos parecen evidenciar es que *muy pocas mujeres se incorporan de manera autónoma e independiente al PSOE*, lo que, unido a la baja proporción de mujeres que desempeñan puestos de responsabilidad, hace que su incorporación efectiva sea en realidad bastante más baja de lo que puedan hacer pensar los porcentajes globales anteriormente indicados» [véase aquí también el apartado, 5.9. “Las conexiones familiares”, pp. 117-120 y la tabla 6.5., “Vinculación familiar al PSOE comparada de los delegados asistentes al congreso extraordinario y al 29 congreso”, p. 146.]. En lo que respectaba a la edad se señalaba, «que los actuales militantes del PSOE tienen unas edades medias, en general, superiores tanto a los de los propios electores socialistas como a los mismos parlamentarios y cuadros políticos socialistas». Por ejemplo la edad media del afiliado socialista era de 47,51 años mientras que los parlamentarios socialistas de 1979 tenían de media 42,67 años o por ejemplo los miembros del Comité Federal tan sólo 38,57. Ahora bien, aquello, según el mismo autor, «contrasta [...] con una cierta imagen de juventud que tiene actualmente el PSOE y que no es sino el resultado de la apreciable juventud de los que están ejerciendo las tareas de responsabilidad socialista». Datos extraídos de, TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, pp. 92-95 y 96-97, respectivamente.

³⁴⁷ MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa...*, *op.cit.*, p. 216.

³⁴⁸ Datos procedentes de, TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, p. 91; y MARAVALL, José M^a, “From opposition to government: the politics and policies of the PSOE” en id. [et al.], *Socialist parties in...*, *op.cit.*, vol. I, p. 12; y, id., “Democracia y socialdemocracia...”, *op.cit.*, p. 49. En ambos casos el último autor recurre a los datos aportados por la Secretaria de Organización de la CEF del PSOE.

³⁴⁹ MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa...*, *op.cit.*, pp. 169-170. De hecho, algunos autores como Miguel Satrústegui han llegado a hablar de cifras de 303.000 miembros para 1991. Véase: SATRÚSTEGUI, Miguel, “PSOE: A new catch-all party” en MARAVALL, José M^a [et al.], *Socialist parties in...*, *op.cit.*, vol. II, p. 39.

³⁵⁰ MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa...*, *op.cit.*, p. 332.

contradicciones del socialismo de este tiempo. *Contradicción* generada entre la posibilidad de optar por un partido de masas al estilo “clásico”, o, bien, priorizar la profesionalización de la organización. Ambas estrategias chocarán en el tiempo y en el espacio, hasta optar por la segunda de ellas. Superado este problema, nuevas e inclusive más conflictivas contradicciones irían apareciendo en los siguientes años. Así en 1983 la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE señalaba con preocupación:

«[E]l principal problema reside en la desproporción existente entre el poder institucional acumulado por el Partido y su nivel de desarrollo orgánico. La dedicación de un elevado número de cuadros políticos del Partido a tareas de gestión institucional plantea problemas que hay que afrontar con planes a corto, medio y largo plazo, entre los cuales uno de los más importantes será el destinado a lograr un incremento sustancial y ordenado de afiliación»³⁵¹.

La evolución organizativa del PSOE pasaría así por sucesivas etapas repletas de problemas y de dilemas. En el breve intervalo de tiempo que transcurrió entre considerarse un *partido de masas*³⁵², de “ser un autentico partido del pueblo trabajador” sin apenas militantes activos, al abandono de la centralidad de la clase obrera y la búsqueda de la conformación de un *nuevo bloque social mayoritario*; el PSOE rediseñaría en varias ocasiones su estrategia de afiliación y de formación de cuadros políticos³⁵³.

Tres nuevos problemas aparecían en este tiempo. El primero de ellos, por ejemplo, fue el de complementar las listas electorales en las primeras elecciones generales³⁵⁴. Signo de una preocupante debilidad orgánica a pesar de la llegada de una enorme cantidad de nuevos afiliados. Segundo, el PSOE rápidamente necesitó cuadros medios y altos de la organización para cubrir la gestión institucional derivada de las primeras elecciones generales y municipales, para los cuales tuvo que contar con afiliados recién llegados sin apenas experiencia política ninguna, y sin prácticamente trayectoria dentro de la organización. Tres, asegurar el control interno de la organización ante las discrepancias, primero, surgidas por la política de alianzas entre las bases y la dirección, y, segundo, ante los enfrentamientos originados a raíz de la celebración del XXVIII³⁵⁵. Un control como se ha dicho que tan sólo quedaría resuelto de forma estable en el Congreso de 1981. Así pues, las tres cuestiones aquí sintéticamente esbozadas

³⁵¹ AHFFLC, PSOE-CE, “Documento de estrategia”, Madrid, octubre de 1983, sig. AI-647-08, p. 11.

³⁵² Durante el proceso de reestructuración organizativa, el PSOE optó por incrementar la afiliación con el fin de avanzar hacia un partido de masas. Unas campañas que serían limitadas en el tiempo al priorizarse, desde muy pronto, la estrategia electoral como ha recordado Mónica Méndez Lago: «Los llamamientos a la movilización de masas fueron abandonados paulatinamente como resultado tanto del tipo de negociaciones que caracterizaron a la transición a la democracia como de la creciente moderación del PSOE tras las elecciones de 1977». MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa...*, op.cit., p. 168.

³⁵³ Un recorrido sobre las estrategias y campañas de afiliación desde la década de los ochenta hasta bien avanzada la de los noventa en, ibídem, pp. 168-ss. Cuya primera conclusión no dejaba lugar a dudas: «[E]l objetivo declarado de aumentar la afiliación estuvo siempre presente en los documentos del PSOE durante el periodo analizado, si bien con una intensidad variable. La meta del crecimiento fue una prioridad durante la fase de la transición a la democracia, su importancia disminuyó mediada la década de los ochenta, para prácticamente desaparecer como objetivo explícito del partido en los documentos publicados a principios de los años noventa». Ibídem, p. 171.

³⁵⁴ La debilidad política y organizativa del PSOE en aquellos años ha sido mencionada por un alto número de dirigentes socialistas. En concreto por, BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, op.cit., p. 143. Véanse también al respecto las declaraciones efectuadas por el mismo Alfonso Guerra en el reportaje “1979” del programa *Crónicas de La 2*, emitido el 13 de diciembre de 2009 [www.rtve.es]. Véase, por lo demás, lo apuntado en la *nota 372*.

³⁵⁵ Consúltese, en todo caso, la lectura que ofrece el propio TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, op.cit., p. 181, para explicar las ‘nuevas’ e ‘inéditas’ relaciones conflictivas o no entre la base y la dirección dentro de los cánones de un partido *viejo/nuevo/moderno* como el PSOE.

muestran, ya no sólo las dificultades a las que se enfrentaron las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda durante los años setenta, sino sobre todo las complicaciones de refundar una organización sometida a intensos y permanentes desafíos políticos y electorales en pocos meses.

El *socialismo español* se transformaría en un instrumento por y para el *ascenso social* de no pocos sectores de la ciudadanía ubicados en la izquierda sociológica³⁵⁶. Parecidas circunstancias ocurrieron en otros tantos sectores del espectro académico y científico de *tinte progresista*, que vieron en la organización socialista una *oportunidad* para colaborar *por el cambio*³⁵⁷.

Mientras tanto se abrirían con el tiempo dos nuevos frentes que, más pronto o tarde, conducirían a otra serie de dificultades: por un lado, la base de la militancia socialista pasaría a un lugar secundario con cada vez menos relevancia política y orgánica, viendo confinado su papel, en la práctica, a las campañas electorales³⁵⁸; y, por otro lado, se produce la apertura de una pequeña brecha entre la militancia política del PSOE y la estrictamente sindical de la UGT. Si hasta la primera convocatoria electoral el trasvase de efectivos sería fluido, en adelante este modelo partido-sindicato comenzaría a debilitarse ante las perspectivas, primero, de formar gobierno, y posteriormente, ante la gestión de las responsabilidades institucionales.

En este acelerado proceso de cambio de fisionomía organizativa se acoplarían otros dos procesos interrelacionados, hasta confluir en la formación de nueva cultura política e identidad socialista: primero, la transición ideológica y programática ya reseñada, y segundo, la búsqueda y concreción de un nuevo tipo de militante/afiliado. Si lo primero giraría en torno a la definición o no marxista del PSOE y su reivindicación y posterior abandono de la centralidad obrera; el segundo de los procesos indicados estaría orientado a la búsqueda de un prototipo de afiliado acorde con la propuesta del nuevo bloque social mayoritario, y, por tanto, alejado, de la que había hasta entonces la típica cultura militante socialista³⁵⁹. En resumen, se buscaría al pretendido y solicitado *español medio*³⁶⁰.

Así el cambio de procedencia social y ocupacional de la militancia socialista, viene a establecerse en un primer indicador de interés de este doble proceso. En 1980, y en base a los

³⁵⁶ Aspecto destacado en más de una ocasión por Santos Juliá: «El partido se convirtió para ellos [los nuevos militantes] en cauce de promoción social, de mejora de sus ingresos económicos y de acceso a instituciones. En la terminología de Pannebianco, los arribistas habían desbordado enseguida a los creyentes». JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 542.

³⁵⁷ Los ejemplos, de nuevo, son en extremo abundantes. A modo de muestra: Noticia, “Intelectuales de diversas tendencias piden su ingreso en el PSOE”, *El País*, 4 de julio de 1981, entre otros se encontraban: Julio Rodríguez Arramberri, Ludolfo Paramio, Jorge Martínez Reverte, Carlos Romero, Julián Santamaría, Santos Juliá, Mercedes Cabrera, Juan Manuel Barreiro o Miguel del Campo. Una lectura crítica, en clave generacional sobre este trasunto en, ESPINOSA, Francisco, “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Generaciones y memoria...*, *op.cit.*.

³⁵⁸ «La sensación general [...] es que los afiliados creen que el PSOE sólo funciona correctamente en momentos de campaña electoral, y que sólo necesita a las bases en esas ocasiones». MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa...*, *op.cit.*, p. 205.

³⁵⁹ Sobre el concepto de ‘cultura militante’ tanto dentro de la izquierda comunista como socialista véase el trabajo de, DOMÈNECH, Xavier, “Cenizas que ardían todavía: la identidad comunista en el tardofranquismo y la transición” en BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (eds.), «*Nosotros los comunistas*»..., *op.cit.*, pp. 93-138. Asimismo no deje de leerse el *Libro del militante* publicado por la organización socialista. Verdadero manual al uso sobre la militancia, sus enseñanzas y forma de comportarse públicamente: PSOE, *Libro del militante...*, *op.cit.*.

³⁶⁰ TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, p. 134. Y concluía: «se diferencia, entre otras cosas, de los afiliados anteriores en que, para él, la política no es el centro de su vida». *Ibidem*.

datos aportados de nuevo por José Félix Tezanos³⁶¹, la *afiliación socialista* presentaba la siguiente estructura: el 65% de los afiliados eran activos ocupados, un 8% parados y un 21% jubilados. En lo que se refiere a la composición ocupacional se mostraba un grado considerable de heterogeneidad: lo que pudiera definirse como obreros de la industria y los servicios constituían por sí solo el 36% de la afiliación, mientras que lo que el mismo sociólogo etiqueta como la *nueva clase media* –cuyos “niveles de participación [...] en tareas de responsabilidad política” eran más altas³⁶²– sumaba un total del 24% de la afiliación (entre *oficinistas y vendedores, docentes y profesionales asalariados*)³⁶³. Finalmente el PSOE contaba con un 18% de activos agrícolas del total de los afiliados³⁶⁴. Un cuadro, en suma, bastante similar a la estructura social en aquel entonces existente.

Aunque la base obrera en su sentido amplio seguía siendo mayoritaria a principios de la década de los ochenta, si se eliminaban a los militantes procedentes del sector servicios siempre de más difícil ubicación, lo que podía observarse por aquellas fechas era, al contrario, la escasa presencia de obreros procedentes de la industria. Ciertamente, el PSOE nunca llegó a contar con una mayoría definida de la clase obrera clásica entre sus filas a lo largo de su historia reciente. Proceso que se acentuaría a lo largo de los setenta pero sobre todo en los ochenta. Desde un punto de partida bajo, la base obrera cada vez tendría ya no sólo menos peso afiliativo sino también político. En este sentido, un dato representativo –junto a la presencia de sólo dos

³⁶¹ Id., “El afiliado socialista” en *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, pp. 89-ss. En concreto consúltese en la página 89, *nota 1*, las características técnicas de este ambicioso estudio. Véase asimismo: TEZANOS, José Félix y GÓMEZ YÁÑEZ, José Antonio, *Los afiliados socialistas. Resultados de una encuesta a los afiliados del PSOE*, Madrid, Grupo Federal de Estudios Sociológicos / Secretaría Federal de Organización, 1981.

³⁶² TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, p. 103. Y añadía sobre esta deseada y buscada *nueva clase media*: «la adscripción al socialismo de la mayor parte de los sectores de ‘nueva clase media’, así como de los activos no asalariados, no parece tener sus raíces en factores de procedencia social (familias obreras), sino que obedece a razones autónomas». *Ibíd.*, p. 105.

³⁶³ Si un tema ha predominado en el último cuarto de siglo en los debates sociológicos, éste ha sido sobre el de la aparición, desarrollo y consolidación de la nueva clase media en la sociedad española. Una *nueva clase media* que se ha querido –y logrado en parte– representarse como el estatus de referencia de la sociedad española por parte del discurso dominante. En el caso que nos ocupa, a saber el de los países occidentales, el proceso de reestructuración del modelo socioeconómico originado tras el fin de la II Guerra Mundial, generó un modelo de vida, y con él unas trayectorias político-laborales, basado en el rápido crecimiento de las rentas personales e implantando el consumo como norma social y cultural. Ahí es donde se ha ubicar el origen de este *nuevo estrato social*. Pero ante todo se debe destacar, tal como ha hecho James Petras, que el «radicalismo ambiguo que caracteriza el nuevo ‘estrato medio’, un radicalismo que desafía a las élites, pero que no pretende nivelar la jerarquización en beneficio de los de abajo» ha permitido sostener las desigualdades sociales históricas. PETRAS, James, *La nueva clase media: ¿parte del problema o parte de la solución?*, s/l, s/ed., 1984, p. 7. En lo que se refiere a datos concretos, el sociólogo Jesús de Miguel utilizando las series de informes CCB y FOESSA que cubren tres décadas (1965-1994), calcula que la clase media vendría a representar entre el 42% y el 54% de la población total. Todo ello en base al origen de la clase social familiar y no en relación –como debería ser– a otros factores ligados con los procesos de desigualdad económica y social: MIGUEL, Jesús M. de, *Estructura y cambio social en España*, Madrid, Alianza, 1998, pp. 266-267. Por lo demás, véase las polémicas tesis mantenidas también en, GONZÁLEZ, Juan Jesús y GARRIDO, Luis Joaquín, “Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales” en GONZÁLEZ, Juan Jesús y REQUENA, Miguel (eds.), *Tres décadas de...*, *op.cit.*, pp. 89-134. Desde otra perspectiva, en este caso *de clase, marxista* este catalogación clasista de carácter liberal sería duramente criticada y cuestionada por el tantas veces citado, LÓPEZ CALLE, Pablo, *La desmovilización general...*, *op.cit.*, p. 85. Consúltense también aquí las hipótesis de trabajo de, LACALLE, Daniel, *La clase obrera...*, *op.cit.*; y, ECHEVERRÍA, Javier, *La movilidad social...*, *op.cit.*. Para lo demás, nos remitimos aquí al apartado “3.3. Debates, lecturas, controversias en torno al nuevo movimiento obrero en la España en la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos”.

³⁶⁴ TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, pp. 100-101.

obreros en la Ejecutiva de 1981– lo representa el descenso de obreros como delegados en los tres congresos celebrados entre 1979 y 1981: 15,9% en el XXVIII Congreso; 7,5% en el XXVIII Congreso extraordinario; y 9,5% en el XXIX Congreso. Un espacio ocupado progresivamente por los *asalariados no manuales y profesionales y técnicos*: 58,1% en el XXVIII Congreso; 65,5% en el XXVIII Congreso extraordinario; y 66,8% en el XXIX Congreso, respectivamente³⁶⁵.

A partir de aquí se constata un nuevo doble proceso. Por un lado, la nueva orientación del PSOE más vinculada a los sectores *sociales emergentes* –por ejemplo, la *sociedad civil* en su más amplio significado³⁶⁶– en detrimento de sus bases tradicionales; y por otro, el ascenso político de un *nuevo* tipo de afiliado en el seno de la organización hasta copar la mayor parte de los cargos con responsabilidades políticas. Ahora bien, a pesar de este proceso de cambio que alejaba al PSOE de ser un partido de masas clásico, no renunció a auto-representarse de tal forma, y de hecho, “aspiraba a serlo, particularmente en la fase anterior al acceso del gobierno”³⁶⁷. Un ejemplo más de que la ideología y la praxis iban por caminos diferenciados. No interesaba ya tanto una organización para la movilización política y social, sino que lo que se buscaba en última instancia, era aumentar la capacidad de gestión de la afiliación para la consolidación de la alternativa de poder que deseaba representar el PSOE.

En términos históricos, lo realmente importante, en todo caso, es la *nueva concepción* de partido que surge de todo lo anterior. Las consecuencias de este cambio buscado y propiciado no sólo van a tener un matiz interno sino también externo. Pues este mismo cambio sobre todo será observable, tanto en la forma de gestionar la organización como la realidad institucional. José María Maravall ha resumido oportunamente esta nueva concepción de partido de la siguiente forma:

«El control que el partido ejerza sobre los gobernantes dependerá de quienes sean los delegados en sus congresos. Si se trata de los militantes de base, el valor que atribuirían al poder será diferente al que le otorgarían delegados procedentes de los cuadros del partido. En consecuencia, las elecciones que determinan la composición de los órganos que controlan a los líderes del partido no sólo son importantes para la democracia interna, sino también para los votantes»³⁶⁸.

De este modo, no sólo es que se buscara un *nuevo* tipo de afiliado más propicio para los tiempos políticos que se avecinaban, sino que el *matiz* ideológico de la afiliación pasaba a un plano secundario. Interesaba, por tanto, más las cualificaciones profesionales que las estrictamente políticas. Lo que ayudará a resolver otro problema no menor: el control interno de

³⁶⁵ Ibídem, p. 143. Añadir que según la misma encuesta la proporción de mujeres delegadas fue siempre baja: «en el Congreso de mayo de 1979 sólo un 7,8 por 100 de los encuestados fueron mujeres, bajando esta proporción a un 4 por 100 en el Congreso de septiembre y a un 4,8 por 100 en el de 1981». Ibídem, p. 137. Por último, dos estudios básicos al respecto en, LACALLE, Daniel, *Profesionales en el estado español: situaciones objetivas y formas de organización*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1977; y, id., *Los trabajadores intelectuales y la estructura de clases*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982.

³⁶⁶ La encuesta sobre el afiliado socialista ya varias veces empleada señalada al respecto de su participación en la sociedad civil, indicaba lo siguiente: 30% asociaciones de vecinos; 28% asociaciones deportivas; 28% asociaciones de padres de alumnos; 23% asociaciones culturales; 10% colegios profesionales; 2% asociaciones religiosas; 16% otras asociaciones. TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, op.cit., p. 114. No deje por lo demás de consultarse otro interesante documento interno del Partido en este sentido: AHFPI, PSOE, Secretaría Federal de Acción Social, “Militancia socialista en la acción social”, Madrid, PSOE, 1982, sig. B 2271.

³⁶⁷ MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa...*, op.cit., p. 347.

³⁶⁸ MARAVALL, José M^a, *El control de...*, op.cit., p. 303. A modo de estudio comparativo obsérvese lo que aconteció en el otro gran partido de la izquierda desde mediados de los años ochenta: RAMIRO, Luis, *Cambio y adaptación en la izquierda: la evolución del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida (1986-2000)*, Madrid, Siglo XXI / Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004.

la organización. Y aquí encaja precisamente ese nuevo tipo de militante que comienza a interesar, de forma clara, a la organización: procedente de la clase media, con un nivel medio de formación, y con deseos de movilidad social. Pero como recuerda, otra vez, José Félix Tezanos la realidad inicial durante la década de los setenta fue bien distinta, por ejemplo, en lo que se refiere al nivel de estudios. Indicaba en su trabajo de campo como un “36 por 100 manifestó que no habían realizado ningún estudio, siendo, en su conjunto, un 6 por 100 los que afirmaron que no sabían leer ni escribir”. De igual forma, “un 38 por 100 manifestaron que habían realizado estudios primarios, un 4 por 100 formación profesional, un 9 por 100 estudios secundarios, un 5 por 100 estudios medios y un 6 por 100 estudios superiores”. No obstante, como traía a colación el mismo sociólogo, aquellos datos eran superiores a los de la media nacional según las encuestas y estudios disponibles en aquellos años³⁶⁹.

Ahora bien, alejados de datos y estadísticas, el dirigente socialista Francisco Bustelo en ese tiempo ha relatado cómo se opera este cambio de concepción de forma mucho más concreta y cercana a la realidad. Aunque su relato tiene mucho de auto-complacencia, el mismo resulta de interés por el retrato que esboza sobre las nuevas dinámicas que se instalan dentro del PSOE. Senador en la legislatura de 1979-1982, Bustelo muestra como en poco tiempo la organización socialista se convirtió en un *ascensor fiable* para la movilidad social:

«Por ello, el PSOE se recuperó rápidamente de su muy relativo descalabro electoral de 1979. Estaba pujante y empezaba a ofrecer a sus militantes, además del incentivo moral de luchar en defensa de los ideales, prebendas, canonjías y beneficios. Bien mirado una de esas prebendas era ser senador. Ya se pagaba más a los parlamentarios, puesto que hasta entonces éstos habían cobrado absurdamente una miseria que no daba para vivir y obligaba a tener otros ingresos. Pero desde 1979 el sueldo de diputados y senadores, en particular para los socialistas, de extracción casi siempre más modesta, resultaba cuantioso y superior a los salarios medios. Como en el Senado había que trabajar poco, e incluso cabía darse importancia, la situación resultaba satisfactoria para muchos. Aunque el partido socialista conservaba aún en la base unos pocos afanes de cambio, como se pudo advertir en el conflictivo XXVIII Congreso de 1979, ello no ocurría entre diputados y senadores. Éstos, al tener que revalidar cada cuatro años la prebenda, necesitaban inexcusablemente la anuencia de la dirección del partido, tanto en el plano ‘federal’ como en el de su circunscripción. Era así muy difícil, habida cuenta del talante vigente en el PSOE, que esos parlamentarios ejercieran la autocrítica, dentro del partido. No ha de extrañar, por tanto que diputados y senadores socialistas fueran y sean dóciles»³⁷⁰.

Al respecto de lo anterior un dato relevante, como recuerda el propio Santos Juliá, lo ofreció el propio Felipe González, quien señalaría en el XXVIII Congreso de mayo de 1979, sin la menor intención de autocrítica, como entonces había más cargos públicos ocupados por

³⁶⁹ TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, p. 79. Y concluía: «Es decir, en su conjunto [...] se puede expresar que el nivel educativo de los afiliados ‘históricos’ es más bien bajo; que en los años del franquismo se incorporan al PSOE un buen número de personas con estudios superiores, sin que en los años posteriores a las elecciones de 1977 se pueda decir que se hayan afiliado al PSOE un número apreciable de cuadros cualificados». *Ibíd.*, p. 100.

³⁷⁰ BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, pp. 156-157. Crítica anterior compartida por James Petras: «Specially, the Socialist party was the vehicle for the coming to power of a new class of upwardly mobile professionals whose only recourse to rapid ascent was politics, and it was through politics and specifically government office they gained access to private wealth and social status. The Socialist party elite has followed a typical three-stage pattern: early militancy involving popular mobilization, leading to election victories and public office, followed by the conversion of public office into elite circles, investments, and high incomes». PETRAS, James, “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y *id.* (eds.), *Mediterranean Paradoxes...*, *op.cit.*, pp. 95-96. Para el mismo autor sólo así se puede entender buen parte de las *contradicciones del socialismo*. A saber, a partir del análisis de los intereses y aspiraciones de los líderes sociales: «The contradictions of Spanish Socialism can best be understood by analyzing the class the character aspirations of its leaders and cadres. The drives and motivations, the shifts in policy and the divisions between the government and its working-class base can best be understood by locating interest specific to their class aspirations». *Ibíd.*, p. 95.

miembros del PSOE que afiliados en el año 1976³⁷¹. A la altura de los primeros años ochenta el “conjunto de puestos de responsabilidad política ocupados por distintos tipos de electos supera[ba] la cifra de los 12.000”³⁷².

En este mismo marco, se asistirá al nacimiento de una *nueva clase para el poder político* como una de las consecuencias más palpables de los caminos que se entrecruzan permanentemente —el ideológico y el organizativo— en la historia del PSOE hacia su acceso al poder político³⁷³. Observemos algunos datos en torno a esta hipótesis de trabajo. La explotación de la encuesta realizada por José Félix Tezanos en los XXVIII (1979), XXVIII extraordinario (1979) y XXIX (1981) congresos socialistas a los delegados asistentes, una vez más, aporta caminos de aproximación para acercarnos a la caracterización de la que será la futura élite socialista en la siguiente década³⁷⁴.

Varias cuestiones sobresalen. La primera, la *apreciable juventud* de la mayoría de los delegados que de media no superan los treinta y cinco años en el primero de los congresos socialistas del año setenta y nueve. Edad que irá aumentando progresivamente en los siguientes

³⁷¹ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 541. El propio José M^a Maravall ofreció los siguientes datos altamente ilustrativos de la creciente ‘profesionalización’ de la política: «The percentage of Congress delegates who held public office either by popular election or by political appointment represented 57% of the 29th Congress in 1981, 61% of the 30th Congress in 1984, and 65% of the 32nd Congress in 1990». Y añadía: «This was not, of course, an exceptional experience of the PSOE: if we look again at the PSI [Partido Socialista Italiano], the proportion of public officials, elected or appointed, went up from 60% in 1981 to 80% in 1984. Ever since 1979, the Federal Congress of the PSOE produced majorities of over 80% of the vote». MARAVALL, José M^a, “From opposition to government: the politics and policies of the PSOE” en id. [et al.], *Socialist parties in...*, *op.cit.*, vol. I, p. 15.

³⁷² TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, p. 99. La profesionalización del ejercicio de la política en el PSOE se hizo evidente desde muy pronto. Lo cual quedó ampliamente reflejado en el congreso extraordinario celebrado en 1979: allí el 88,3% de los delegados desempeñaban algún puesto de representación. Por otro lado, Richard Gillespie ofrece unos datos a tener en cuenta en relación a la singular situación que se daría en el primero de los congresos de aquel mismo año: 11.475 concejales, 1.125 alcaldes —21 de ellos en capitales de provincia incluyendo Madrid y Barcelona— 190 diputados y senadores. Datos extraídos de, GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, p. 366. A todo ello se suma la información proporcionada por Cesar Alonso de los Ríos y Carlos A. Elordi, quienes señalaron como la dirección socialista estimaba que en caso de llegar al poder se tendría que nombrar entre 3.000 y 4.000 cargos nuevos. ALONSO de los RÍOS, Cesar y ELORDI, Carlos A., *El desafío socialista...*, *op.cit.*, p. 62. En este sentido, no faltarían los *roces* con el sindicato hermano en este tiempo ante la constante política de atraer al *Partido* a destacados militantes y cuadros ugetistas. Así lo ha recordado Nicolás Redondo: «Sí, recuerdo una circular de Antón Saracíbar denunciando el comportamiento del PSOE. Nos encontrábamos con responsables de UGT a los cuales el PSOE les proponía estar en listas sin haber consultado a la dirección de UGT». En declaraciones a, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, *op.cit.*, p. 103. Todavía más. Rubén Vega transcribirá una carta de Nicolás Redondo a Felipe González fechada un 7 de abril de 1982 y en donde se dirigía en los siguientes términos: «Sabrás que estamos haciendo un esfuerzo considerable por fortalecer nuestra Organización, conoces nuestras carencias a nivel de cuadros sindicales, y la sangría que supone para UGT cualquier tipo de confrontación electoral con el consiguiente trasvase a las tareas políticas de responsables cualificados de la Unión. Hubiera sido de interés, por lo tanto, el que se nos hubiera consultado, y tenido en cuenta nuestros criterios». VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, *op.cit.*, p. 125. Por último, resultaron ilustrativos una serie de reportajes recogidos en el diario *El País* varios años después: “Proceso de rejuvenecimiento de las bases”; “Muchos votantes, pocos afiliados”; “Dominio de la izquierda”, todos ellos en, *El País*, 14 de octubre de 1984.

³⁷³ Sobre el nuevo perfil del militante socialista y la consiguiente profesionalización de los cuadros del PSOE, véanse los datos aportados por: CARABANTES, Andrés, *Balance y futuro...*, *op.cit.*, pp. 152-ss.

³⁷⁴ En este caso los datos proceden de otra fuente: la *encuesta* de los delegados a los congresos entre 1979 y 1981: TEZANOS, José Félix, “Los cuadros socialistas: radiografía de tres congresos (1979-1981)” en *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, pp. 135-ss.

encuentros congresuales³⁷⁵. En segundo término, destaca la escasa antigüedad de los delegados a los encuentros congresuales. De hecho, el 70,6% de los delegados al primer XXVIII Congreso tenían menos de cuatro años de antigüedad como ya se adelantó. Ya en el congreso extraordinario de aquel mismo año, los afiliados al PSOE con entre dos y cuatro años de antigüedad constituían el 53,4%, percibiéndose un incremento de delegados relativamente más veteranos. Particular transición demográfica observable en el XXIX Congreso en el que entonces los delegados con menos de cuatro años de antigüedad se habían reducido ostensiblemente a un 25,4%³⁷⁶. Tercero, igualmente revelador es el periodo de entrada en el PSOE: 4,4% *durante el periodo de la II República o antes*; 21% *durante el franquismo*; 23,7% *entre la muerte de Franco y el XXVII Congreso*; 24,3% *entre el XXVII y las elecciones de 1977*; 20,9% *entre las elecciones de 1977 y el Congreso Extraordinario de 1979*; y un 4,5% *después del Congreso extraordinario de 1979*³⁷⁷. En cuarto lugar, en relación con la procedencia social para el Congreso de mayo de 1979, el nivel medio de estudios del *delegado* socialista al contrario del *afiliado* siempre sería bastante alto. Situación harto similar con la de los miembros de los grupos parlamentarios socialistas en las Cortes y en la CEF³⁷⁸. Así en el primero de los congresos estudiados la encuesta reflejó que un 32,8% habían cursado carreras universitarias, un 15,9% estudios medios, y en total un 59,2% tenían una formación por encima del bachillerato superior. Cifras que se mantuvieron sin grandes oscilaciones en los restantes congresos analizados³⁷⁹. Y en quinto lugar, la extracción socio-profesional de los delegados a los tres congresos mostraba, primero, “[u]na presencia muy importante de asalariados no manuales” y segundo, “[u]na presencia muy poco importante de funcionarios del partido y de la UGT (menos de 5 por 100)”. A *grosso modo* los datos que señalaba la citada encuesta venían a ser los siguientes para cada uno de los tres congresos citados: “No activos”, 9,8%, 6,9%, 4,5%; “Asalariados manuales”, 15,9%, 7,5%, 9,%; “Asalariados no manuales”, 33,4%, 36,6%, 40,1%; “Profesionales y técnicos”, 24,7%, 38,9%, 26,7%; “Propietarios y autónomos”, 8%, 10,1%, 7,5%; Cargos públicos; s/d, s/d, 6,7%; “Otras ocupaciones”, 1,7%, 8,8%, 3,3%; y, “No responden”, 6,4%, 1,1%, 1,6%. En resumen, los mismos ponían de relieve el “gran peso que en la actividad interna [...] tienen los militantes con actividades típicas de lo que podemos considerar como de «clase media»”³⁸⁰.

Concluida la etapa de reorganización organizativa, la otra de las cuestiones enunciadas, el control interno del partido, se convertiría en un arma de doble filo. La nueva concepción partidista del socialismo resultante de los tres congresos socialistas claves a lo largo de su proceso de refundación entre 1979 y 1981, giraron en torno a tres instrumentos principales: el control político a todos los niveles que se ejerció desde los órganos de poder con la Comisión Ejecutiva Federal y el Comité Federal a la cabeza; la aprobación e implantación de

³⁷⁵ *Ibídem*, p. 137.

³⁷⁶ *Ibídem*, pp. 137-140.

³⁷⁷ *Ibídem*, p. 139.

³⁷⁸ Véase el apartado 7, “Los órganos de dirección federal” en *Ibídem*, pp. 151-177. Citaremos un par de datos más que vienen a sumarse a la larga lista de evidencias en torno a la tesis de la *profesionalización* del PSOE y del creciente peso de la *nueva clase media* en los órganos de dirección: primero, si en la CEF de 1979 los miembros que llevaban menos 5 años afiliados eran el 57,9%, esta cifra se reduciría rápidamente al 18% tan sólo tres años más tarde; segundo, la Ejecutiva salida del Congreso de 1981 tendría la siguiente composición ocupacional como antes se ha avanzado en la *nota 315*: 36% *profesores universitarios*; 16% *abogados*; 12% *economistas*; 8% *obreros manuales*; 8% *técnicos y administradores*; 8% *funcionarios públicos*; 4% *ingenieros*; 4% *médicos*; 4% *escritores*. Con razón se concluía: «[L]as últimas renovaciones de 1981 no pueden entenderse sino a partir de una búsqueda de unas mayores cualificaciones y como consolidación, a su vez, de los cambios anteriores». Procesos denominados como de ‘mesocratización’ que como recuerda el mismo autor también se estaban dando, sin ir más lejos, en el propio PCE. *Ibídem*, pp. 170, 176, 177 y 145, respectivamente.

³⁷⁹ *Ibídem*, p. 141.

³⁸⁰ *Ibídem*, pp. 142-144.

unos mecanismos de elección de los candidatos electorales con un sistema basado en la representación proporcional, listas cerradas y bloqueadas, que permitió en todo momento manejar a las diferentes familias socialistas en liza; por último, y el más significativo a nuestro juicio, el sistema de representación mayoritario dentro de la organización introducido en el XXVIII Congreso del PSOE ya comentado.

Las consecuencias de este sistema fueron de doble tipo en perspectiva temporal: rentable electoral a corto y medio plazo pero *destructiva* a nivel orgánico a medio y largo plazo. Si bien es cierto que se aseguraría la unidad y la disciplina en un partido acostumbrado a sufrir fuertes tensiones y conflictos internos que, en no pocas ocasiones, terminaban en crisis y expulsiones; la construcción desde el *aparato* de las mayorías necesarias generaría unos mecanismos de control que conducirían a la organización socialista a futuras *crisis políticas*.

Entre los efectos de este singular modelo de democracia interna estuvo el proceso de de “oligarquizarían” –en donde surgirían los poderosos *barones* regionales socialistas– y por tanto de generación de unas clientelas políticas³⁸¹. Así el PSOE se iría cerrando tanto a la llegada de nuevos militantes como a nivel de la sociedad, hasta el punto de que los procesos de renovación interna se vieran cortocircuitados con el paso de los años. Muestra de ello es la longevidad política de la generación de dirigentes que accedió al poder a mediados de los años setenta y cuya salida de los órganos del poder se produciría de forma escalonada durante los años noventa y los primeros del actual siglo. La larga permanencia de algunos de los fundadores del *nuevo* socialismo –véase, por ejemplo, los casos Manuel Chaves, Luis Yáñez o Joaquín Almunia, entre otros muchos– en los centros decisorios de la vida política del país –o inclusive a nivel internacional– a pesar de los cambios políticos y no pocos acontecimientos históricos-electorales acaecidos, retratan la que, sin duda, es una de las generaciones políticas más longevas de nuestra contemporaneidad.

El proceso de interiorización organizativa del PSOE se aceleraría en la década de los ochenta. José María Maravall ha apuntado una serie de datos a tener en cuenta: “[M]ientras que en el congreso de 1979 sólo fue reelegido el 42 por ciento de la Comisión Ejecutiva, en 1981 y 1984 esa proporción llegó al 76% por ciento, al 81% por ciento en 1988, y en 1990 sólo fue sustituido un miembro que no quiso presentarse de nuevo”³⁸². Un particular corporativismo en el seno de la organización socialista con sus consiguientes ramificaciones en las tareas de Gobierno, que con el tiempo llegaría incluso a recordar al modelo del PRI mexicano³⁸³. *Corporativismo* en donde pesaría enormemente un doble factor humano: el liderazgo indiscutible de Felipe González quien siempre actuó como el ideólogo y estratega del partido³⁸⁴;

³⁸¹ El propio Felipe González en uno de los discursos pronunciados durante el primer XXVIII Congreso exigiría a los delegados un mayor proceso de crítica, avisando de paso sobre los peligros de una posible *oligarquización del partido*. GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, p. 376.

³⁸² MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, p. 33.

³⁸³ La degradación interna de la organización alcanzaría sus niveles máximos a principios de la década de los noventa, especialmente cuando se conocieran públicamente los primeros casos de corrupción en el seno del Partido y del Gobierno –y no necesariamente en este preciso orden–. Sería a partir de ahí cuando, de nuevo, la situación por la que atravesaba el PSOE llegaría a recordar tiempos no muy lejanos. Véase asimismo un análisis comparativo sobre la creciente falta de democracia interna en los partidos socialistas del sur de Europa en, GILLESPIE, Richard y GALLAGHER, Tom, “Democracy and authority in the socialist parties of southern Europe” en GALLAGHER, Tom y WILLIAMS, Allan M. (eds.), *Southern European socialist...*, *op.cit.*, pp. 163-187. De similar opinión han sido tanto, CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, *op.cit.*; y, GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*.

³⁸⁴ Sobre la atracción y el liderazgo de Felipe González se han escritos numerosas páginas. Aquí nos remitimos de nuevo al Capítulo 2, *nota 494* y siguientes. Por lo demás, y sin pretender dar cuenta de todas las referencias existentes sobre el asunto, si conviene remarcar como si previamente los nuevos dirigentes socialistas acusaron a Llopi de sustituir el socialismo por el *llopismo*, otro tanto cabría señalar con la sustitución del socialismo por el *felipismo*. Término éste que se convertiría en la bandera de

y el representado por Alfonso Guerra, la *eminencia gris* del PSOE por excelencia³⁸⁵. Si ambas figuras concentran buena parte del relato del socialismo es por la sencilla razón de que el PSOE alcanzaría con ellos sus máximas cuotas de poder político. Más aún. La alargada sombra de su protagonismo ha eclipsado a otras tantas figuras de la organización.

Por lo demás, la relativa tranquilidad con la que se afrontaron los sucesivos congresos del PSOE durante los años ochenta y los primeros años noventa –por ejemplo, durante el XXX (1984), el XXXI (1988) y el XXXII (1990) congresos socialistas– fue posible, en gran medida, porque el sistema de clientelas funcionó razonablemente, en tanto las prebendas a repartir dentro del mercado político eran numerosas. Con lo que la posibilidad de acallar las voces críticas –cuando las hubo– estaba garantizada. Ahora bien, más allá de los ejercicios de autopromoción y de la ausencia de críticas reales en relación con la gestión de los gobiernos socialistas, que caracterizaron los procesos congresuales y la vida interna del partido, la realidad organizativa fue deteriorándose.

En aquel tiempo, en verdad, hubo posicionamientos críticos pero fueron los menos durante todo este periodo. Sólo con el paso de los años, concretamente mediada la década los noventa, se comenzó a cuestionar seriamente el modelo de partido desde dentro, aunque no necesariamente desde sus centros decisorios. En todo caso, no sería hasta el XXXIV Congreso del PSOE en junio de 1997 en el que Felipe González anunciaría que no se presentaría a la reelección, tras más de dos décadas al frente de la Secretaría General, cuando el modelo organizativo y las líneas políticas comenzaron a *virar*. Y si se estos cambios políticos tuvieron lugar se debió, en gran medida, a la derrota en las elecciones generales de 1996 que el propio González perdería por un estrecho margen de votos. Iniciándose una crisis política, identitaria y organizativa de enormes dimensiones, en donde las acusaciones y el reparto de responsabilidades ocuparían buena parte de la agenda política de la organización en los siguientes años.

Con todo, tan sólo una pequeña parte de los protagonistas de aquel tiempo han traído a colación la realidad político-organizativa del socialismo durante los años noventa. La mayor parte de las críticas –cuando estas se han hecho públicas– han estado orientadas más a cuestiones políticas y/o estratégicas antes que a los aspectos organizativos en sentido estricto. No han sido muchos los dirigentes que siguiendo dentro del PSOE o en sus contornos más próximos, se hayan aventurado por tales lides. Tampoco difiere la situación de aquellos otros

enganche, de izquierda a derecha, de los detractores del PSOE. No obstante, el liderazgo indiscutido de Felipe González fue asumido como algo natural, tan natural que no hubiera existido el PSOE tal y como fue. Entre las muchas descripciones posibles véase la proporcionada por Manuel Chaves: «El liderazgo de Felipe González se fraguó de una forma muy natural, porque era el mejor. Porque era el hombre que tenía más capacidad de análisis, mucha más capacidad de convencimiento, de convencer dialécticamente, y yo creo que también era una persona con una gran preparación [...]. Yo creo que la capacidad de liderazgo de Felipe era natural». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 310. Asimismo vuelva a consultarse la definición de *felispino* dada por, CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, *op.cit.*, p. 126, en concreto en el Capítulo 2, *nota 411*.

³⁸⁵ Entre los múltiples retratos del quien fuera durante muchos años Vicepresidente del Gobierno se ha destacar el de Tom Burns, cuando lo describe como el consumado político capaz de controlar un partido tan complejo y conflictivo como el PSOE: «Es Guerra, autodidacta en tantas cosas, quien se hizo el experto consumado del partido en técnicas electorales y quien dirigió la campaña de 1977, que convirtió el PSOE en la segunda fuerza electoral del país; es Guerra, ya de diputado y reconvertido en jurídico, quien en 1978 deshace entuertos, pacta acuerdos y ayuda a hacer realidad un consenso constitucional; es Guerra, como organizador y director de escena que siempre fue, quien entrega a Felipe González un partido férreamente disciplinado después del susto que ambos se pegaron en el tormentoso congreso que en 1979 debatió el tema del marxismo. Si la contribución de Alfonso Guerra al socialismo es diáfana en aquellos años, el impacto de su acción política posterior es mucho más difícil de calibrar». BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 117.

que rompieron con la organización y que una vez no atados a viejas disciplinas y diversas lealtades, han dado su opinión, excepto contados casos³⁸⁶.

Así pues, pocos de los cuadros socialistas que estuvieron implicados en la organización se han detenido a examinar el modelo de partido socialista que surgió en los setenta, que se consolidó en los ochenta y que explotó en los noventa, tal y como lo ha hecho José María Maravall en *El control de los políticos*. Libro que apenas suscitó atención en su momento más allá de una serie de reseñas periodísticas³⁸⁷. Y ello a pesar tanto de las importantes tesis allí mantenidas como de la documentación inédita de carácter personal, que el autor aportó para explicar la nueva concepción de partido que caracterizó al PSOE. Definido este como un modelo de aquiescencia, disciplina y convivencia³⁸⁸, el autor aporta un documento que se nos revela de especial interés. A saber, una carta personal que mandaría a Felipe González en 1987, en donde el entonces cuadro socialista se describe la siguiente crítica situación interna:

«El partido ha ido cambiando mucho. La densidad de las relaciones de poder no tienen comparación con ningún otro momento [...]. La endogamia, el clientelismo, las ‘guardias pretorianas’ han sido reforzadas [...]. La pobreza política e ideológica actual del partido es grande [...]. Hay también quienes piensan que para ser diputado todas las precauciones son pocas para no ser víctima del sectarismo. Si efectivamente se tuviera que estar más preocupado por el aparato que por los electores, los problemas de la política interna del partido adquirirían una dimensión adicional muy seria [...]. El partido necesita reflexionar en serio, ampliamente, con audacia. No porque de esa reflexión vaya a salir la luz, pero sí una mayor capacidad de prever, de actuar, de reaccionar. La cuestión es que muchos sectores del partido están así: mucha mafia y pocos principios»³⁸⁹.

En fin, el PSOE realizó dos transiciones simultáneas: la política-externa –la postfranquista– y la interna –la transición del socialismo a la ideología de la modernización con la parada intermedia en la efímera concepción socialdemócrata, que no aguantó mucho tiempo el blanco y el negro de los propios textos congresuales–. En cada una de ellas, sin embargo, optó por un único modelo político que priorizó, primero, la no ruptura con el anterior régimen, y segundo, la profesionalización de la política desde muy pronto. Mientras que ambas tuvieron éxito, el modelo con todas sus contradicciones y problemas se pudo mantener. No sería así en la segunda mitad de la década de los noventa. Pero eso es otra *historia*.

Las consecuencias y los costes de esta particular apuesta orientada por una visión elitista de la política se irían sumando con el paso del tiempo. La primera de las circunstancias que rodearon a este modelo ya fue explicada en su día por Richard Gillespie: “[E]l partido [socialista] español pasó por un cambio dramático que lo llevó muy a la derecha de la Internacional, y si no llegó a su extremo fue porque esa posición estaba ocupada ya por los socialistas portugueses de Mario Soares”³⁹⁰. En segundo término, la propia la concepción del partido que allí surgió –con las consiguientes resonancias en los propios gobiernos socialistas– si por algo destacó fue precisamente por su escaso contenido democrático. En este sentido,

³⁸⁶ Véanse las ya en más de una ocasión citadas: BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*; CASTELLANO, Pablo, *Yo sí me acuerdo...*, *op.cit.*; SAAVEDRA, Antón, *Secuestro del socialismo...*, *op.cit.*.

³⁸⁷ Véase el Capítulo 2, *nota 418*.

³⁸⁸ MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, p. 156.

³⁸⁹ *Ibíd.*, p. 35.

³⁹⁰ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, p. 313. Véase también el muy sugestivo trabajo de, GALLAGHER, Tom, “The Portuguese Socialist Party: the pitfalls of being first” en GALLAGHER, Tom y WILLIAMS, Allan M. (eds.), *Southern European socialism...*, *op.cit.*, pp. 12-33. En este sentido resulta revelador, SOARES, Mario, *Portugal’s struggle for liberty*, London, Allen & Unwin, 1975. E igualmente recordar el trabajo de fondo de, DURÁN, Rafael, *Contención y transgresión...*, *op.cit.*.

influyeron no pocas cuestiones: la concepción de ser portadores de una misión histórica; el liderazgo indiscutido e indiscutible de Felipe González y de Alfonso Guerra; el pragmatismo y el oportunismo político en donde los presupuestos ideológicos no tenían cabida... Y todos estos elementos terminaron confluyendo en el seno de una organización política de la que nacería una nueva cultura política, que en su forma de hacer política y de gestionar el poder político marcaría a varias generaciones de ciudadanos. Su protagonismo en el cambio histórico por el que atravesó a la sociedad española es, por tanto, innegable. Lo que corresponde ahora es interrogarnos por la dirección de este cambio histórico.

4.4. «Por el cambio»: *el punto de no retorno* (1981-1982)

«A comienzos de 1982 sabíamos que en unos meses, máximo un año, la responsabilidad de gobernar España descansaría sobre un grupo de jóvenes antifranquistas casi sin práctica política en libertad, pero representado a un viejo partido con una experiencia acumulada en cuanto a los objetivos y los métodos para hacer de España un país moderno y democrático; un partido sin parangón entre los partidos socialistas».

Alfonso GUERRA, *Cuando el tiempo nos alcanza*³⁹¹.

En cada efeméride en torno al 28 de octubre de 1982 no se ha dejado de remarcar el significado histórico de aquella fecha para la consolidación del sistema democrático. Ahora bien, lo cierto es que, con mayor o menor pábulo, se ha procedido en la práctica a *mitificar* el día de las terceras elecciones generales como el punto de inflexión, en donde moría de una vez el régimen político del franquismo y en el que se ha asistía a la inauguración de una nueva etapa en la historia del país. Hasta tal punto que el veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y dos ha pasado a ser una referencia cronológica central en el relato hegemónico de la transición.

La propuesta socialista de “el cambio” o “por el cambio” se trocó en su momento en una *idea-fuerza*, que aglutinaría el voto de más de diez millones de ciudadanos. Y todavía hoy es recordada vivamente más allá de la valoración política de lo que conllevaron las políticas emprendidas por el socialismo. Numerosísimos factores de orden interno y externo confluyeron para que las elecciones de 1982, llegaran a alcanzar este significado histórico.

Estamos ante una *fecha frontera*. No obstante, esta idea debe ser matizada. Pues difícilmente la transición política pueda darse por finalizada de forma completa hasta la entrada de España en la CEE en 1986 –incluyendo aquí también la entrada en la OTAN después del dramático referéndum sobre la permanencia celebrado el 12 de marzo de 1986, a pocos meses de las segundas elecciones que ganaría con mayoría absoluta el PSOE (junio de 1986)³⁹²– pues, de hecho, el camino emprendido por los socialistas franqueó numerosos contratiempos. Aunque los peligros potenciales de una involución democrática disminuyeron ostensiblemente y comenzaron a afianzarse una serie de instituciones claves para cualquier sistema democrático, este proceso de consolidación tuvo mucho que ver con las moderadas políticas emprendidas por los gobiernos socialistas. Junto con una política económica destinada a completar la segunda fase de la reestructuración del capitalismo español contemporáneo, que aseguraría, definitivamente, la tranquilidad de las clases dominantes, se inaugurarían las políticas de la no memoria democrática. Es decir, los sucesivos gobiernos socialistas no llevarían a cabo la menor revisión del pasado dictatorial del país, y con ello, las víctimas de la dictadura quedarían desatendidas *sine die*. Lo que se justificaría como la necesidad de *mirar adelante* engendraría un

³⁹¹ GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, *op.cit.*, p. 331.

³⁹² Véase aquí el interesante trabajo de, EQUIPO DE SOCIOLOGIA ELECTORAL, “El Referéndum de marzo de 1986 sobre la permanencia de España en la OTAN y sus consecuencias para el sistema político”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 52, (1986), pp. 183-215.

conflicto político que estallaría a mediados de los años noventa³⁹³. Éste y otros tantos problemas políticos y socio-económicos como lo que se conocería en los ochenta como la *deuda social*, quedarían aplazados, siendo muy representativos de las sinergias que acompañó al trayecto modernizador.

En muy pocas ocasiones en la historia contemporánea de España, un partido, un gobierno y unos líderes llegaron a contar con tal respaldo de la sociedad. En pocos episodios de nuestra reciente historia una fuerza política concitaría en torno a sí tantas promesas e ilusiones de “esperanza” de que por fin todo *cambiará*³⁹⁴. Los socialistas fueron conscientes, en todo momento, de esta inédita situación política. Y efectivamente no tardaron en llegar las decisiones gubernamentales. Ahora bien, *el cambio* pronto se mostraría muy diferente a lo que amplios grupos de la ciudadanía, y concretamente buena parte de la clase trabajadora y el propio movimiento sindical, habían pensado que conllevaría.

“El PSOE hoy sólo asusta a los trabajadores” declararía el líder crítico de los socialistas, Pablo Castellano, un año antes de la llegada al poder del Gobierno socialista³⁹⁵. Una afirmación que a tenor de los resultados electorales de octubre de 1982 desmintieron en parte. Que el PSOE no iba a llevar a cabo una política revolucionaria, o sencillamente *socialista*, era una cuestión que en aquellos días que antecedieron al periodo de las *elecciones del cambio*, podía comprender cabalmente quien hubiera seguido con un mínimo detenimiento la espectacular evolución del socialismo.

La principal fuerza política de la izquierda no sólo aspiraba a consolidar su posición preeminente en el ajedrez político, sino que tenía por gran y única meta la victoria en las siguientes elecciones. Esta sentida y esperada aspiración de poder impulsaría la última etapa de redefinición política y programática. Así en tan sólo unos pocos meses la organización profundizará en el modelo ideológico y organizativo de la configuración del “PSOE como el partido de la modernización”.

Aunque Calvo-Sotelo anunciaría la convocatoria de elecciones el 27 de agosto de 1982³⁹⁶, la CEF del PSOE comenzó a elaborar la estrategia electoral definitiva, al menos, desde noviembre de 1981 con la configuración de todo un programa de Gobierno, que incluía la planificación de los futuros equipos ministeriales³⁹⁷. De este modo, se entró en la recta final en la que socialismo lograría desprenderse de cualquier vestigio de su pasado radical. Precisamente esta etapa que media entre octubre de 1981 con la celebración del XXIX Congreso socialista, pasando por la importante reunión de la CEF dos meses después de la que se hablará a

³⁹³ Un amplio balance sobre esta complejísima cuestión en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Presentación. La «memoria democrática» como conflicto” en id. (coord.), *La memoria como..., op.cit.*

³⁹⁴ De forma meridianamente clara lo expresó Ignacio Tosa a los pocos meses del triunfo socialista: «El hastío, la repulsa de la continuidad, son profundos en el cuerpo social y nadie podrá negar al PSOE el de no haber sabido levantar la esperanza y una actitud positiva en amplios sectores ciudadanos». TOSA, Ignacio, “Desde la izquierda por el cambio”, *Leviatán*, nº 10, (1982), pp. 41-42.

³⁹⁵ Declaraciones a *Diario 16*, 12 de octubre de 1981.

³⁹⁶ Real Decreto 2057/1982, de 27 de agosto, *de disolución de las Cortes Generales y fijación de la fecha de las elecciones* [B.O.E. 30 de agosto de 1982].

³⁹⁷ En las conclusiones elaboradas por la CEF tras la citada reunión, se señalaban entre las tareas prioritarias a desarrollar las siguientes: «1. Trabajar en el programa del gobierno y en las prioridades del partido [...]; 3. Poner en marcha el aparato electoral y los trabajos sobre la Ley Electoral; 4. Empezar a estudiar los equipos y el personal de cada Ministerio; 5. Establecer un tratamiento y análisis cuidadoso de la información sobre temas militares y de seguridad; 6. Terminar el proyecto de seguridad interna para el partido». AHFFLC, PSOE-CEF, “Sobre la situación política. Informe de la CEF del PSOE”, Madrid, noviembre de 1981, sig. 002280-007, p. 11. El equipo de trabajo estaría coordinado por Alfonso Guerra y Joaquín Almunia con la colaboración de Roberto Dorado.

continuación, junto con la posterior configuración del programa electoral durante buena parte de 1981, es el segundo de los periodos históricos del socialismo que no sólo han sido menos estudiados, sino que más desapercibidos han pasado para los propios historiadores. Y todo ello a pesar de que serán durante estos meses cuando se producirá, ahora sí, el vuelco total en los posicionamientos políticos del PSOE, dejando incluso en *papel mojado* lo aprobado en su último proceso congresual.

La estrategia del PSOE tras el XXIX Congreso había cambiado de rumbo: no se trataba de conquistar el poder político a costa de entrar en un Gobierno de coalición con la UCD y con otras fuerzas políticas. Lo que se planteaba ahora sencilla y llanamente era “desarrollar una política de exigencia al Gobierno”, porque “el PSOE no deberá ni ofrecer más coalición excepto en caso de emergencia, ni buscar tumbar al gobierno, ni facilitar la disolución de las Cámaras”³⁹⁸. En consecuencia, y a la espera de la caída definitiva del Gobierno presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo, la conquista del poder político mediante la victoria en las urnas, estaría centrada en un triple eje de actuación: en primer lugar, continuar con la política de responsabilidad; segundo, el manteamiento de las nuevas señas de identidad recién adquiridas, lo que junto con el reforzamiento de las prioridades programáticas, sirvieran para diferenciarse de su principal oponente político; y en tercer lugar se retomaría una política de movilizaciones hasta el triunfo electoral en base a una estrategia de tintes gramscianos:

«En democracias como la nuestra, además, es necesario tener siempre presente que no se tiene el poder ni con el 51% de los votos: se necesita un extenso apoyo en la sociedad para ejercer el poder (y ello no después de conquistarlo, sino también antes). También en esta dirección nos obliga a caminar la Resolución Política del 29 Congreso»³⁹⁹.

Llegar en la mejor de las condiciones políticas posibles y evitar a su vez los costos de la *política de corresponsabilidad*, vinieron, pues, a transformarse en las principales consignas. Mientras tanto, la organización tenía que seguir tensando la gestión institucional en una política de desgaste que tenía sólo un límite: evitar generar tensiones innecesarias que debilitarían gratuitamente la precaria situación de crisis institucional. En cualquier caso, los tiempos políticos que manejaba el PSOE no estaban del todo claros. Por un lado se mantenía que el objetivo principal era que el Gobierno de Calvo-Sotelo en plena descomposición “gobierne hasta el 83 desarrollando los acuerdos, que no retrotraiga los avances de la democracia”. Por otro lado, se estimaba como la hipótesis más probable de que las elecciones se adelantarán al mes de mayo de 1982. Ni uno ni lo otro. Tocaba ser pacientes.

Lo anterior no fue obstáculo alguno para que la dirección socialista en la decisiva reunión de la CEF de noviembre de 1981, comenzará a preparar unas elecciones legislativas que no tardarían mucho tiempo en llegar. De modo que, mientras se esperaba la debacle definitiva de UCD, una vez concretada la política institucional a seguir y puesta en marcha la maquinaria electoral de la organización, al partido le correspondía la no fácil tarea de seguir representando la única opción del cambio. *Opción* que se concretaría en que la más que probable llegada al Gobierno por parte del PSOE se convertía, sí o sí, en la única posibilidad real para el mantenimiento de la democracia. Si bien a nivel interno el autoconvencimiento era total, en cambio, la organización socialista debería realizar ímprobos esfuerzos para superar las inquietudes y miedos que el peso de sus *siglas* más que su *programa*, seguían despertando en amplios sectores sociales:

«Es probable que en el próximo futuro se acentúen las dudas sobre si el partido se puede permitir ganar las elecciones [...]. Todas estas dudas se resumen en la pregunta de cómo puede el

³⁹⁸ AHFFLC, PSOE-CEF, “Sobre la situación política. Informe de la CEF del PSOE”, Madrid, noviembre de 1981, sig. 002280-007, p. 10.

³⁹⁹ AHFFLC, PSOE-CEF, “Sobre la situación política. Informe de la CEF del PSOE”, Madrid, noviembre de 1981, sig. 002280-007, p. 10. Sobre la formulación dentro del PSOE del planteamiento gramsciano de ‘hegemonía social’ desde mediados de los setenta, véase: GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Evolución ideológica del..., *op.cit.*, pp. 64-ss.

PSOE luchar mejor por la democracia sí en el poder o sí en la oposición. La respuesta a esta pregunta se puede condicionar, pero en líneas generales debe ser: en el poder. Sólo ello asegura que por fin se puedan emplear las palancas para desmontar la Espada de Damocles del golpismo; esta es la única respuesta para no aceptar una democracia controlada, es decir, el neo-Franquismo; ello puede también evitar en mayor medida que la sociedad no se distancie de la democracia si los mismos (en lo peor) siguen el poder. Sin duda se trata de un círculo vicioso de la política: la posibilidad de la llegada del PSOE al poder agudiza las amenazas a la democracia, pero sólo esa llegada permitiría superar esas amenazas. Nada asegura que en 1.987 estemos en mejor situación»⁴⁰⁰.

Meses más tarde Alfonso Guerra concretaría esta estrategia durante una reunión del Comité Federal celebrada los días 13 y 14 de marzo de 1982. Bajo la idea de que “el PSOE es la única vía para reforzar la democracia”, señalaba:

«Finalmente, Alfonso Guerra planteó los siguientes interrogantes: ¿tiene el PSOE como estrategia ganar las próximas elecciones?, ¿qué tipo de sector social tiene que apoyar al Partido para poder ganar?, ¿de dónde sacar el millón y medio largo de votos que actualmente necesitamos? En relación con estas interrogantes, Alfonso Guerra planteó la necesidad de que ese objetivo de aproximación social tiene que estar marcado por lograr un incremento de apoyo social al PSOE, a Izquierda y Derecha, lo cual es difícil de conseguir, aunque no contradictorio»⁴⁰¹.

«El Partido Socialista, consciente de estos difíciles problemas de que en torno a él se han ido concentrando muy variadas esperanzas, ha integrado con rigor esas justas aspiraciones en un proyecto coherente».

Extracto del programa electoral del PSOE, *Por el cambio*⁴⁰².

Los dirigentes socialistas, con Felipe González a la cabeza, se encargaron, a su manera, de tranquilizar en los meses previos a las elecciones a todos aquellos sectores políticos, sociales y especialmente económicos, que llegado el caso podían actuar como sujetos desestabilizadores del por sí debilitado sistema democrático. A partir de ahí tres férreas *consignas* se impusieron:

⁴⁰⁰ AHFFLC, PSOE-CEF, “Sobre la situación política. Informe de la CEF del PSOE”, Madrid, noviembre de 1981, sig. 002280-007, p. 13. Y remarcaba: «Es preciso pues, conjugar una política de responsabilidad y soporte de la estabilidad del gobierno con una política de firmeza en la labor de oposición que no frustre a nuestro electorado y a nuestra base social» (p. 14). En todo caso el planteamiento de Alfonso Guerra ya estaba presente desde años atrás en las filas socialistas: «Si queremos llegar a transformar la sociedad, hemos de llegar al poder y para ello necesitamos 8 millones de votos. No tenemos más remedio que ampliar nuestra base hacia la derecha». Declaraciones de Felipe González al diario *YA* el 19 de mayo de 1978.

⁴⁰¹ AHFPI, PSOE-CF, “Resumen del acta y acuerdos del Comité Federal. Reunión Ordinaria. Madrid, 13 y 14 de marzo de 1982”, Madrid, 1982, sig. Fc 3910, pp. 13-14. Y se añadía a continuación: «Para ello, es preciso realizar una estrategia política, parlamentaria y no parlamentaria alrededor de la influencia socialista, de las élites de la izquierda que se quedan huérfana de representación política y de las de la derecha de nuestro partido y sectores del centro sociológico que también están huérfanos» (p. 14). Esta línea estratégica y de trabajo se mantendría en la siguiente reunión del Comité Federal ya en julio de aquel mismo año. Sobre su contenido, AHFPI, PSOE-CF, “Resumen de la segunda reunión ordinaria del Comité Federal del PSOE. Madrid, 24 y 25 de julio”, Madrid, 1982, sig. Fc 3912.

⁴⁰² PSOE, *Por el cambio. Programa electoral*, Madrid, PSOE, 1982, p. 6. En este trabajo, dadas sus características se empleará el programa electoral en formato reducido y dirigido a un público general. En todo caso, véase asimismo los amplios y elaborados documentos preparatorios del programa electoral en, AHFFLC, PSOE, Comité Electoral Federal, “Proyecto de programa electoral del PSOE”, II vols., Madrid, septiembre de 1982, sig. AI-139-03. Y también, AHFPI, PSOE, Comité Electoral Federal, “Guía de campaña elecciones 1982: confidencial”, Madrid, 1982, sig. Fc 4076; y, AHFPI, PSOE, “Guía de comunicación socialista”, Madrid, 1982, sig. B 2190.

responsabilidad, respetabilidad y moderación fueron de la mano⁴⁰³. Igualmente se evitó, ahora sí, todo tipo de triunfalismo⁴⁰⁴. A lo que se sumaría un tercer elemento: la promesa de no revisión y/o cuestionamiento de las instituciones y nomenclatura franquista. Esto último más que un planteamiento político firme era una clara concesión ante el hecho de que “las clases dominantes sólo estaban dispuestas a tolerar un gobierno socialista a falta de un recambio más efectivo”⁴⁰⁵. Recordada sería por aquellas fechas –primavera de 1981– una frase Ferrer Salat: “La democracia es un invento de la burguesía empresarial, no lo olvidéis. Los empresarios apostamos por ella, aunque no estamos satisfechos de cómo ha ido hasta ahora”⁴⁰⁶.

Garantizada la impunidad política y jurídica del franquismo –así como de sus *crímenes*– y el mantenimiento del *statu quo* socioeconómico⁴⁰⁷, la llegada y conquista del poder no era una mera aspiración política sino un “instrumento para provocar un cambio de orientación histórica en el país”. La cuenta atrás para la *consolidación de la democracia* (de mercado) había comenzado⁴⁰⁸. La misión histórica se concretaba: que *España pudiera cambiar su destino*

⁴⁰³ «En primer lugar, ha estado llevando a cabo una estrategia de ‘responsabilidad’ ante la fragilidad de la democracia, aceptando la prioridad de defenderla. Su contribución a la estabilidad del país no puede nunca infravalorarse [...]. A la vez, se ha hecho un esfuerzo por subrayar las señas de identidad ideológicas, programáticas y políticas del Partido». AHFFLC, PSOE-CEF, “Sobre la situación política. Informe de la CEF del PSOE”, Madrid, noviembre de 1981, sig. 002280-007, p. 7. Entre los datos más interesantes que se extraen del informe destaca un sondeo electoral que el propio partido había elaborado en octubre de 1981. En lo que respecta a intención de voto se daban los siguientes datos: 29% PSOE, 11% UCD, 8% AP, 3% PCE, 11% de abstención y un 30% para la Ns/Nc. Igualmente la misma encuesta revelaba que el 50% prefería a Felipe González como presidente del gobierno y un escaso 18% a Calvo-Sotelo (p. 8).

⁴⁰⁴ Diversos son los documentos en los que se advierte repetidamente de la necesidad de evitar cualquier tipo de triunfalismo ante el más que probable triunfo socialista: «Los acontecimientos se suceden con rapidez y no se puede tener demasiada confianza en la situación política en la que el PSOE se va a encontrar. Por el contrario, debe evitarse cualquier triunfalismo: el Partido debe templarse para afrontar un largo periodo de lucha, independientemente de los resultados electorales. La complacencia con los supuestos resultados victoriosos puede ser enormemente dañina para el Partido, para su solidez y para su estrategia». AHFPI, PSOE, “Situación política y alternativa del PSOE”, 1980? sig. Fa 1419, p. 27. Un año después se insistía –o mejor dicho se repetían muy similares argumentos– en las mismas líneas de trabajo evaluando como posible fecha de convocatoria electoral el mes de mayo de 1983: «Falta mucho tiempo y no se puede tener demasiada confianza en la situación política en la que el PSOE se va encontrar. Por el contrario, debe evitarse cualquier triunfalismo: el partido debe ser capaz de afrontar un largo periodo de oposición y endurecerse para una lucha en esta dirección. La complacencia con los supuestos resultados victoriosos puede ser enorme dañina para el partido, para su solidez y para su estrategia». AHFFLC, PSOE-CEF, “Sobre la situación política. Informe de la CEF del PSOE”, Madrid, noviembre de 1981, sig. 002280-007, p. 8.

⁴⁰⁵ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 47.

⁴⁰⁶ Extraída de, GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, op.cit., p. 170.

⁴⁰⁷ Nos encontramos aquí con uno de los *consensos historiográficos* en auge, aunque todavía, °, minoritarios dentro del panorama general historiográfico contemporáneo. Sobre estas cuestiones, nos remitimos a lo apuntado en el Capítulo 2, *nota 564*.

⁴⁰⁸ Compartimos aquí la crítica realizada por James Petras sobre el significado que adquirió el concepto de la ‘consolidación de la democracia’: «What was (and is) described as ‘consolidating democracy’ obscured a more complex and basic process: the consolidations of capital and the strengthening of capital’s control over the state [...]. The consequences of the consolidation of capitalist power that accompanied the consolidation of the electoral regime included a steep increase in the percentage of national income to owners of capital, increases in productivity, greater insecurity of employment for labor and, conversely, an increase in the power of capital to hire and fire workers, contract temporary workers, or subcontract work to home production». PETRAS, James, “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y id. (eds.), *Mediterranean Paradoxes...*, op.cit., p. 108.

*histórico*⁴⁰⁹. Sentadas estas bases, el PSOE se encargaría de transmitir continuamente mensajes concretos y sencillos a sus potenciales electores pero también a quienes no le votarían con toda seguridad: “El cambio es que España funcione” o “Este pueblo tiene derecho a la esperanza” fueron algunos de los más escuchados. Ejemplo de ello sería la campaña promovida por la CEF y el Comité Electoral del PSOE destinada a la *movilización* de electorado, pero también de cara a evitar cualquier tipo de *miedo* en torno a las siglas socialistas⁴¹⁰.

A partir de ahí la organización socialista explotaría conscientemente lo que se llegaría a denominar como el *sentimiento del cambio* hasta su propia “mitificación”:

«La campaña electoral movilizó a los ciudadanos en general, y especialmente a nuestros electores, más profundamente que nunca, lo cual suscitó muchas interpretaciones o reelaboraciones inconscientes del Cambio y del programa del Cambio; de tal forma que desbordaba amplia y desordenadamente su estructura y contenido originales, colocándolo en un espacio simbólico cercano al mito»⁴¹¹.

Bajo el eslogan de “Por el cambio”, en suma, la campaña electoral basó su discurso no sólo en una calculada moderación, sino es que impregnaría sus diferentes mensajes de tintes regeneracionistas en donde se desprendía un llamamiento moral y ético a la ciudadanía⁴¹². Todo

⁴⁰⁹ Declaraciones de Felipe González a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 793.

⁴¹⁰ Véase, AHFPI, PSOE, Comité Electoral Federal, “Guía para tu participación. 1. Movilización institucional”, Madrid, 1982, sig. Fa 1273. Como recuerda Santos Juliá, una vez más, el PSOE pondría un especial empeño a medida que se acercaban las elecciones en extremar «la moderación y los mensajes tranquilizadores». Poniendo los siguientes ejemplos: «por supuesto, no se procedería a más nacionalización que la red de alta tensión; la enseñanza privada seguiría recibiendo subvenciones; el gobierno respaldaría a los poderes financieros y protegería la economía de mercado». JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 585. Ejemplo de todo lo anterior fueron los sucesivos artículos publicados en el periódico del PSOE en los meses previos. Un caso ilustrativo: “Los empresarios no temen un triunfo del PSOE”, *El Socialista*, n 248, 10-16 de marzo de 1982. La noticia se elaboraría a partir de una encuesta realizada a los empresarios para la revista ‘Perspectivas y mercados’, y en donde el porcentaje que vería favorable la llegada del PSOE se estimaba en 39,2 puntos y a AP en 43,3.

⁴¹¹ AHFPI, PSOE-CE, “Memoria de Gestión 1981-1984. 30º Congreso”, Madrid, diciembre 1984, sig. Fc279, pp. 7-11. José Félix Tezanos, una vez más, lo resumiría a su manera: «El ‘Espíritu del 82’ fue, en este sentido, una especie de eclosión pacífica y serena –a través de las urnas– de muchos afanes y proyectos, varias veces frutados y pospuestos en la Historia de España». TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 26. Del mismo autor véase asimismo su más que optimista visión tras dos años de gobierno socialista en, id., “Cambio social y...”, *op.cit.*. La contracara de esta visión nos la proporciona de nuevo Francisco Bustelo: «Cuando se haga una historia serena y cierta del escenario socialista, habrá que tener en cuenta, entre los aspectos que propiciaron el gran triunfo del PSOE en 1982 y los habidos después de tres elecciones generales sucesivas, la gran ilusión que hubo por una España distinta, ilusión que fue creciendo desde 1977, hasta desbordarse en el voto sin precedentes de las elecciones generales de 1982. Esa ilusión era lógica en un pueblo que había despertado de la larga noche franquista y quería encontrar como fuese algo distinto. El PSOE y con él Felipe González, acertaron a ofrecer esas apariencias de cambio, que desgraciadamente el tiempo vino a demostrar que en buena medida eran tan sólo eso: apariencias». BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, pp. 170-171.

⁴¹² En varias ocasiones se ha descrito o mejor dicho se ha auto-descrito Felipe González como el portador de un mensaje de regeneración del país y de la sociedad: «En 1982 hice una campaña con un mensaje electoral empapado de aquel regeneracionismo que –creo– la gente entendió bastante bien, porque estaba dispuesta a hacer un esfuerzo de ese tipo. La verdad es que era una apuesta de confianza en las posibilidades del propio país». Declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 791. Un balance exhaustivo de las bases de este proyecto en, PARAMIO, Ludolfo y MARTÍNEZ REVERTE, Jorge, “Por una reforma moral e intelectual de España”, *Leviatán*, n° 10, (1982), pp. 23-26. A saber, dos de los recién incorporados *intelectuales* a la organización.

ello no exento de un cierto populismo demagógico⁴¹³. Asimismo se combinó aquellos mensajes con una retórica nacionalista, en donde se quería proyectar una nueva idea de España muy alejada de la ofrecida por la dictadura.

Por este camino, “[l]a oferta electoral socialista trataba de dar esperanzas a todos y no contrariar a nadie, e incluía muchos aspectos ideados para poner a España a la altura de los países occidentales más desarrollados económicamente”⁴¹⁴. De ahí saldría lo que el sociólogo Víctor Pérez Díaz definiría como “una estrategia prudente, conservadora y acomodaticia con las expectativas de un amplio espectro de la población”. Lo que terminaría conduciendo a un “ronroneo de políticas públicas pragmáticas, graduales, conservadoras de lo fundamental del *status quo*, ha sido y es el telón de fondo de adhesión del público al gobierno socialista y ha dado al país una década de lo que algunos llaman estabilidad política y otros hegemonía socialista”⁴¹⁵. Igualmente como reconocía otro intelectual socialista gran parte del éxito de aquel programa electoral, residió en su “carácter no ideológico y partidista”. Esta apuesta, no sin riesgos, propiciaría una “desideologización propia del socialismo moderno, moderado, europeo, racional que había logrado «enterrar» de una vez por toda la antigualla ideológica de los padres del socialismo clásico”⁴¹⁶. En eso, justamente, consistiría la *alternativa socialista*⁴¹⁷.

En este proceso marcado por la aceleración de los *tiempos políticos*, el PSOE llegaría a 1982 con un pre-programa de gobierno extremadamente elaborado, en el que había venido invirtiendo no pocos esfuerzos y tiempo. Faltaban tan sólo una serie de detalles que complementarían su alternativa de poder basada en la *oferta socialista para el cambio*. Pequeños detalles que, no obstante, transformarían cualitativamente la primigenia *oferta socialista*⁴¹⁸.

En la práctica todo se combinaría a la perfección en la campaña electoral de 1982. *Campaña* en donde el PSOE apareció como un alumno aventajado frente a sus competidores. Las condiciones *objetivas y subjetivas* favorecieron la alternativa de poder socialista, pero también es cierto que en mucho ayudó el acertado diseño de la misma campaña bajo la batuta de Alfonso Guerra como ya venía siendo habitual⁴¹⁹. Un equipo electoral que se complementaría

⁴¹³ En más de una ocasión James Petras ha remarcado el estilo ‘populista’ de las campañas de los partidos socialistas del sur de Europa: «La ambigüedad de los slogans, a la hora de especificar qué intereses de clase saldrían beneficiados y cuáles perjudicados, fue considerada por gran parte de la izquierda como una hábil táctica electoral para asegurar el apoyo de las clases bajas sin alienar a la clase media». PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, op.cit., pp. 32-33.

⁴¹⁴ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, op.cit., p. 426. Aquí consúltese el trabajo de este mismo autor en id., “Spanish socialism in the 1980s” en GALLAGHER, Tom y WILLIAMS, Allan M. (eds.), *Southern European socialist...*, op.cit., pp. 59-85.

⁴¹⁵ PÉREZ DÍAZ, Víctor, *España puesta a...*, op.cit., p. 50. De parecida opinión es Charles Powell aunque el mismo autor introduce unos matices más positivos: «En suma, podría afirmarse que el programa del PSOE no hizo sino reconocer la esperanza, compartida por amplios sectores de la población española, de que, más allá de su dimensión política, la transición a la democracia tuviese también consecuencias sociales beneficiosas». POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 322.

⁴¹⁶ SANTESMASES, Antonio, “Los límites infranqueables...”, op.cit., p. 15.

⁴¹⁷ Véase aquí, SOLANA, Javier, “La alternativa socialista”, *Leviatán*, nº 9, (1982), pp. 7-16.

⁴¹⁸ El PSOE en la construcción de su *alternativa de poder*, desde por lo menos 1979, había ido elaborando lo que denominaría la *oferta socialista para el cambio*. La *resolución política* del XXIX Congreso socialista marcaría los objetivos básicos y mínimos de esta oferta de cambio: 1) democratización definitiva del Estado; 2) la defensa de las libertades y de la seguridad ciudadana; 3) la modernización de la sociedad hacia cotas de libertad y bienestar de que disfrutaban las democracias más consolidadas; 4) atención prioritaria de la superación de la crisis económica; 5) definición clara de un proyecto de política exterior; 6) construcción del Estado de las Autonomías. AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 5.

⁴¹⁹ El testimonio de Guerra aclara bien las intenciones del conocido lema incrustado en la memoria aún de millones de personas: «Diseñé una campaña electoral sencilla, limpia, que diese como algo obvio

con Guillermo Galeote, Roberto Dorado, Gabriel Jiménez, Nacho Varela, Helga Soto, Miriam Soliman, Javier Tezanos –hermano menor de José Félix– Íñigo Larrazábal y Rafael Delgado⁴²⁰. A estos factores claves se sumó un elemento que fue menor en su día, pero que ahora se nos aparece como fundamental a la hora de reconstruir la llegada de los socialistas al poder político: su *programa electoral*.

Los programas electorales –como ya se ha visto anteriormente– son documentos cuya valía en el terreno de la lucha electoral, tienen un lugar menor a la hora de la decisión de la orientación del voto a nivel particular. En cambio, resulta de extraordinario interés de cara al trabajo historiográfico aunque normalmente sean omitidos de sus análisis. Aunque, precisamente, al que nos estamos refiriendo haya sido uno de los más recordados como citados. No son pocas las evidencias que sostienen esta afirmación.

En nuestro caso concreto, el programa electoral del PSOE cumplió una doble función: a) como la presentación del programa político –cuando menos en sus líneas centrales– de un futuro gobierno socialista, en tanto la organización partió desde el inicio de la campaña como el probable vencedor; b) por otro lado, el programa desempeñó un papel central de cara a las clases medias y los poderes económicos, a la hora de disipar dudas sobre el futuro planteo de las propuestas políticas y económicas centrales a llevar adelante por los socialistas. Por último, a pesar de que este tipo de documentos suelen estar caracterizados por su ambigüedad programática, el citado programa electoral socialista contenía importantes pistas y/o caminos de aproximación tanto para avanzar por muchas de las políticas que se emprenderían en breve, así como para constatar el definitivo *salto adelante* a nivel programático del socialismo, y con él, el *punto de no retorno del PSOE*.

Bajo la coordinación de Joaquín Almunia, los primeros pasos en la elaboración del programa ya se habían visto reflejados en las tesis políticas y económicas aprobadas en el XXIX Congreso socialista. A partir de ese momento, Almunia acompañado de un competente equipo de trabajo, iniciaría la fase final de redacción del citado documento. Programa electoral que respondió básicamente a dos prioridades programáticas socio-económicas y un gran objetivo político. En primer lugar, a la concreción de un conjunto de políticas que pudieran hacer frente a la situación de la crisis económica, cuyo principal componente era la creciente situación de desempleo. Y en segundo término, la elaboración de un programa de amplias reformas, de carácter teóricamente socialdemócratas, que establecían las fases necesarias para la modernización económica y la posterior creación de un *precario* estado del Bienestar. Todo ello, a través de políticas económicas de carácter expansivo. Por lo demás, el objetivo político seguía siendo el mismo: la consolidación de la democracia.

Los socialistas tenían claro que no podían permitirse el “lujo” de no volver a *ganar* las elecciones. Así de sencillo. Se ha habido estado demasiado cerca en dos ocasiones. Tan sólo un desastre motivado por una mala dirección de la campaña o algún otro factor no previsto podían dar al traste con las previsiones que las encuestas venían ofreciendo y que no dejaban de remarcar el futuro triunfo socialista. No podían fallar. No fallaron. Ahí estaba su programa electoral como la mejor de las cartas de presentación. Un programa repleto de buenas intenciones más que de propuestas concretas, y que venía ser la culminación adaptativa de la evolución política, ideológica, cultural e identitaria del socialismo español.

Si los programas electorales de 1977 y 1979 del PSOE, como se ha remarcado en más de una ocasión, fueron, en suma, moderados, pragmáticos y lejos de “falsos” radicalismos, el del año ochenta dos, ya sin tapujos ni cortapisas ideológicas, era –en la práctica más allá de su contenido formal– el de una fuerza política cada vez más desdibujada ideológicamente. O si prefiere más cercana a la de un “partido de centro” que todo lo abarca y sintetiza en consignas

el triunfo, pero que incentivara la participación de los electores. Nos inclinamos por un lema sintético, ‘Por el cambio’, que me parecía lleno de fuerza y atractivo». GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, *op.cit.*, p. 332.

⁴²⁰ Datos procedentes de, PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González...*, *op.cit.*, p. 231.

grandilocuentes. Y señalamos esto, ya que en el mismo se puede encontrar desde medidas de la socialdemocracia más clásica, a medidas que podrían a lo sumo de ser tildadas de “progresistas” y en otros muchos casos de “liberales”. Cada una de ellas tenía un destinatario concreto: la clase trabajadora, la clase media y la clase dominante y no por este orden y lógica. Su misma *presentación* no dejaba dudas.

«La gran mayoría de los españoles es consciente de que sus esperanzas de modernización y de transparencia de las estructuras del Estado, de la sociedad y de la economía han sido repetidamente frustradas por la vacilante política de los gobiernos recientes, que han contemporizado con los grupos más reaccionarios y egoístas, preocupándose más de sus propias disensiones internas que de los auténticos problemas de la sociedad»⁴²¹.

De esta forma se despachaba el segundo párrafo del programa *Por el cambio*. Ahí estaba, ni más ni menos, que concretada la tesis de la “modernización frustrada” del país, como un gran fracaso colectivo –lugar común donde los haya– que no podía perpetuarse por más tiempo. Eso sí, la solución a tal problema estaba bastante descafeinada en sus registros políticos entendiendo que se trataba de un partido socialista, socialdemócrata o como se quisiera denominar el que proponía las mismas. Así se hablaba, por ejemplo, de “voluntad de progreso y de solidaridad”, “necesidad de cambio”, o de un “ordenamiento constitucional [...], que ofrece el marco ideal para modernizar el país”⁴²². Como se puede observar, de entrada, todo estaba en su medida exacta, comedido en sus términos, y oportunamente desideologizado. Muy ajustado a los nuevos tiempos de las *fuerzas vivas* del socialismo español, en donde aquellas propuestas de un modelo alternativo, socialista, por no hablar de *clase*, habían pasado a mejor vida.

A continuación se señalaba como a pesar de la *parálisis institucional* y de la *crisis económica* –que como se recordaba había alcanzado los “dos millones de parados, a un ritmo de mil diarios en 1981”⁴²³– había lugar para la “esperanza”.

«[E]xisten márgenes de maniobra no despreciables dentro de la coyuntura económica para ir modernizando nuestros aparatos productivos, reavivar la actividad económica y generar en cuatro años un paquete importante de nuestros puestos de trabajo que aligere considerablemente la lacra social del paro»⁴²⁴.

Evitando ya hablar de *política liberal* para referirse al programa económico de los gobiernos de la UCD para calificarla sencillamente de “vías conservadoras puesta en práctica [que] no han solucionado nada” se insistía, una y otra vez, en que se podía salir adelante a través de una política racional que aplicada “gradualmente”, y bajo la consigna de la “planificación concertada” –que como veremos se constituiría en otro metáfora más del proyecto socialista– pronto, aunque no sin sacrificios colectivos, daría sus frutos. Otro tanto sucedía con los aspectos no desarrollados de la Constitución, problema autonómico en primer lugar. U otro tanto con los servicios sociales, la cultura... “Es absurdo pensar que la país puede seguir soportando una política cuyos únicos resultados son el manteamiento de estructuras de poder [...] caducas a costa de desempleo, de reducciones salariales y de una política presupuesta regresiva” se concluía⁴²⁵. Diagnosticado los males de la nación, y una vez concretados sus problemas superficiales y subterráneos en no más de dos páginas, tocaba el pronóstico. No sin antes remarcar como,

«[e]l Partido Socialista ha sabido durante todo este periodo de tiempo conjugar el lícito e imprescindible papel de oposición con el de facilitar responsablemente la gobernación y la

⁴²¹ PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 5.

⁴²² *Ibíd.*

⁴²³ *Ibíd.*

⁴²⁴ *Ibíd.*, p. 6.

⁴²⁵ *Ibíd.*, pp. 5-6.

estabilización, dentro del espíritu pacificador y constructivo que la Corona ha promovido, en armonía con el sentir del pueblo»⁴²⁶.

Trayendo a colación, asimismo, la necesidad de “apartar de una vez por todas los obstáculos y resistencias que ponen los grupos reaccionarios frente al avance y a la aspiración a la igualdad y a la libertad”⁴²⁷. Se cerraba aquel *círculo virtuoso* señalando como “[e]ste programa asume las esperanzas y las aspiraciones de la mayoría y debe tener el respaldo de la mayoría electoral de forma clara, para poder ponerlo en práctica con serenidad y decisión”⁴²⁸.

En aquella ocasión, se repetía la estructura, en lo básico, con el programa del setenta y nueve, lo que a su vez correspondía con las prioridades antes descritas. Primero, *crisis económica y empleo*, segundo toda una pléyade de medidas sobre *derechos sociales y socioeconómicos* – ejes del futuro estado del Bienestar⁴²⁹ – para afrontar por último los aspectos más políticos relacionados con la segunda fase de desarrollo de la Constitución, la reforma de la Administración o la política exterior.

Precisamente por este último y amplio flanco la oferta socialista se limitaba a ofrecer ya *viejas* propuestas, ahora astutamente reelaboradas con los continuos adjetivos de la *modernización, racionalización* e inclusive *europaización* en sus más diversas acepciones. Mezcla todo ello de contenido socialdemócrata y de tintes progresistas. Bajo el grandilocuente epígrafe de “Una sociedad más libre” se evitaban, en un primer instante, algunas *consignas* populistas tanto sobre la seguridad ciudadana como en torno a la unidad nacional, para profundizar en los elementos más prioritarios por los que el país debería andar en pos de consolidar el proceso democrático. Varias y entrelazadas etapas aparecían en dicho trayecto. Primero habría que democratizar a España, a través de un ambicioso plan de desarrollo de la Constitución, y en el que la Administración Pública –a la que se calificaba de una “trincherera de privilegios y prebendas, un aparato hostil a los ciudadanos y a los contribuyentes”⁴³⁰– sería el instrumento para llevar a cabo dicha *misión*. Para ello se tendría que trabajar en la consecución de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas afianzando los valores de la Constitución. El segundo elemento a desarrollar estaría centrado en una profunda reforma de la Administración de la Justicia. En tercer lugar, la reforma de las fuerzas armadas era de especial importancia con el fin de lograr su subordinación definitiva al poder civil⁴³¹. En cuarto lugar, *el*

⁴²⁶ Ibídem, p. 5.

⁴²⁷ Ibídem, p. 6.

⁴²⁸ Ibídem.

⁴²⁹ Véase epígrafe: “II. Una sociedad más justa e igualitaria” en PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, pp. 22-32. Apartado en donde también pueden observarse numerosas similitudes con los programas electorales de 1977 y 1979 en sus respectivos epígrafes: “Cambiar la vida” y “Bienestar social”. Aunque introduciendo algunos puntos nuevos como el tema del medio ambiente o los derechos del consumidor. Asimismo consúltense con detenimiento los epígrafes “II. 1. Seguridad Social”, “II. 3. Educación” y “II. 8. Programa de servicios sociales”, verdadero nodo de la futura construcción del estado del Bienestar típico de la época socialista. PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, pp. 22, 23-25 y 28-29, respectivamente

⁴³⁰ Ibídem, p. 6.

⁴³¹ De enorme interés, al respecto, son los *escritos* del que fuera, entre otros muchos cargos, primer Ministro de Defensa de los gobiernos socialistas y durante 1991 a 1995 Vicepresidente del Gobierno. Nos referimos a Narcís SERRA –*La transición militar: reflexiones en torno a la reforma democrática de las fuerzas armadas*, Barcelona, Debate, 2009–. Véase asimismo: BOYD, Carolyn P. y BOYDEN, James M., “The Armed Forces and the Transition to Democracy in Spain” en LANCASTER, Thomas y PREVOST, Gary (eds.), *Politics and Change in Spain*, New York, Praeger, 1985; BUSQUETS, Julio (ed.), *El papel de las Fuerzas Armadas en la transición española*. Dossier monográfico *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 36, (1986); y, NAVAJAS, Carlos, “«No más golpes de Estado». La política de Defensa de Narcís Serra (1982-1996)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, pp. 103-120. Por último, y desde una visión radicalmente diferente: GRIMALDOS, Alfonso: *La CIA en...*, *op.cit.*.

cambio socialista pasaba ineludiblemente por reforzar la maquinaria del Estado como instrumento del cambio social ampliando sus funciones. Y en quinto y último término, la democratización del Estado no sería posible sin el desarrollo del Estado de las Autonomías, para lo cual había que adaptar el texto constitucional a las diferentes demandas de las nacionalidades y regiones del país. Resumen y punto aparte: continuidad en lo básico con lo esbozado desde principios de los años ochenta, aunque influido por una nueva retórica en ocasiones pomposa, en otras ambigua, pero que no dejaba de remarcar el carácter modernizador, progresista, solidario así como la propia moral del proyecto socialista⁴³².

Si por este flanco el PSOE se limitaba a ofrecer un perfil ya sólo no moderado sino de carácter centrista, el contrapeso izquierdista vendría de la mano de las propuestas en política exterior. Aspecto en el que PSOE no dejaría de insistir de cara a diferenciarse políticamente de sus adversarios por la derecha. La búsqueda del voto de la franja sociológica de la izquierda, se resolvería, pues, con la promesa de celebrar un referéndum sobre la entrada de la OTAN. Promesa de donde saldría el todavía recordado eslogan: “OTAN, de entrada no”⁴³³. Como destacó Richard Gillespie esta propuesta no fue casual, pues ante la “extrema blandura de los planes económicos” este punto concreto sirvió para “demostrar que el PSOE seguía siendo un partido de la izquierda”⁴³⁴. El propio Nicolás Redondo fue más claro en su día: “lo único chocante por radical que hay en él [programa] es la promesa de celebrar un referéndum [sobre la OTAN]”⁴³⁵.

En todo caso, si un aspecto sería observado con sumo detenimiento no fue otro que el programa económico allí expuesto. No sólo es que el vocablo e ideología de la *modernización* lo dominará todo, sino es que no aparecía ya ningún rastro de viejos y trasnochados radicalismos. Repetimos. Lo que había allí era una propuesta de un *gran pacto social por la modernización* en palabras de un *entusiasta académico*⁴³⁶.

Un nuevo proyecto político se aventuraba velozmente, a partir de cual en donde se prometía la superación de la crisis, la creación de empleo e inclusive llegado el caso la consecución de la *felicidad* de los ciudadanos y ciudadanas. Hasta la configuración definitiva de la oferta socialista en este campo, se habían pasado varias etapas en donde, progresivamente, se eliminarían los contornos más conflictivos desde el originario proyecto socialista pasando más tarde por el socialdemócrata. De hecho, desde la misma izquierda socialdemócrata se recordaría en aquellos momentos que una vez “enterrado el marxismo, los socialistas no son un enfáticamente un partido socialdemócrata” siendo la mejor muestra su propio programa económico⁴³⁷. Si ya se ha dejado sobrada constancia de que para el socialismo las cuestiones

⁴³² Véanse los siguientes epígrafes: “III. Una sociedad más libre” (pp. 33-40) en donde destacan especialmente por su concreción dos apartados: la reforma de la Administración de Justicia (pp. 35-36); y la Defensa Nacional (pp. 38-40) en, PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*.

⁴³³ Primero véase dentro del programa: “III. V. Política exterior de España” (p. 45). Sobre la estrategia en paralelo diseñada por la dirección socialista consúltase: AHFPI, PSOE-CE, “Documento para los ‘responsables’ del PSOE campaña «Exige que te escuchen, exige un referéndum»”, Madrid, Secretaria General de la CEF / Departamento Internacional, 1982, sig. Fc 1835. Un año antes el PSOE publicaba otro interesante documento en más de un aspecto contrario con el que se acaba de citar: AHFPI, PSOE, “50 preguntas sobre la OTAN”, Madrid, PSOE, 1981, sig. Fa 1429.

⁴³⁴ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, pp. 426-427.

⁴³⁵ Declaraciones de Nicolás Redondo a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, p. 209.

⁴³⁶ TEZANOS, José Félix, “El PSOE entra en democracia” en id. (coord.), *PSOE 125...*, *op.cit.*, pp. 140-142.

⁴³⁷ VERGÉS, Josep C., *Qué quieren los socialistas. La respuesta económica al proyecto socialista*, Barcelona, Sirocco, 1982, p. 7. El citado autor desgana, paso por paso, el programa económico del PSOE, concluyendo como el mismo lejos estaba incluso de una propuesta socialdemócrata al uso: «El proyecto socialista, que ha fracasado en Inglaterra y que está fracasando en Francia, se pretende implantar

ideológicas y programáticas siempre fueron una preocupación menor; lo que sobresale en este caso es, por un lado, la brusquedad del vuelco en sus posicionamientos rompiendo de esta forma su transición programática gradual, y por otro, la aparición de un nuevo programa económico socialista con no pocos elementos diferenciadores del aprobado en el XXIX Congreso.

Observemos las connotaciones de este otro *cambio* en el programa socialista. Al igual que había sucedido con los aspectos estrictamente políticos, en este caso el Grupo Federal de Economistas comenzó a elaborar un detallado programa de Gobierno a principios de la década de los ochenta, en el que se mantenía una clara orientación socialdemócrata en sentido estricto. Programa, asimismo, cuidado hasta todos sus extremos en lo que a lenguaje político y los posibles márgenes de actuación se refiere⁴³⁸. Veamos algunos antecedentes. Pues precisamente, junto lo aprobado en las tesis socioeconómicas del XXIX Congreso, otros *documentos* pueden ser de utilidad para explicar las dimensiones del *cambio* referido.

En un informe interno titulado “Estrategia económica” con fecha de 1980, tras un análisis crítico del sistema capitalista se remarcaba la necesidad de avanzar en los considerados “objetivos de clase”: la corrección de los desequilibrios entre *las clases dominantes y dominadas*. Allí se definía como el “objetivo nacional” se sustentaría en “evitar que en la nueva división internacional del trabajo que a consecuencia de la crisis se está produciendo, España se configure como un país cada día más pobre y dependiente”. Todo ello bajo el presupuesto de un *esfuerzo solidario* que en la etapa socialista se transformaría en una especie de *mantra* que todo lo justificaba y podía⁴³⁹. Pues según los propios socialistas la *consolidación de la democracia* debía entenderse como un “proceso dinámico que supere progresivamente el desequilibrio presente entre las clases, complete la democracia política y conquiste la democracia económica y social”. Lo cual conducía a una *estrategia económica* que tenía como prioridad primera “la creación de riqueza para la colectividad y el progresivo control de la economía”. De alcanzarse se habría dado un paso para un futurible “control social [que] debe eliminar prebendas y corrupciones, debe sanear la economía y maximizar el desarrollo”⁴⁴⁰. En esta tesitura los llamados *Acuerdos de Planificación* devendrían en centrales para la superación de la crisis económica y, por tanto, los mismos se convertían en parte de una posible la solución del creciente desempleo. Problema al que se tachaba como la *prioridad irrenunciable*.

Al mismo tiempo, se continuaba planteando la irrevocable necesidad de modificar los “mecanismos de reproducción” económica, a través de la potenciación de un fuerte Sector Público, que equilibrara a corto y medio plazo el reparto de los costes sociales y económicos de la crisis⁴⁴¹. Con la crítica por delante a “los defensores del sistema capitalista”, se introducían

en un país que no lo espera. No en vano los socialistas no hablan abiertamente de su estrategia económica. Los empresarios, y los ciudadanos en general, desconocen casi completamente el proyecto socialista. El silencio se interpreta como ‘moderación’. Ibídem, p. 82.

⁴³⁸ «El proyecto de ‘Estrategia Económica’ del PSOE pretende ser un documento que dé a conocer las líneas maestras por las que debería discurrir una política de progreso, en la actual coyuntura, al servicio de las clases populares». Y en lo que se refiere a los siempre citados márgenes de actuación se señalaba: «Somos conscientes de que vivimos una época difícil, de profunda crisis económica; que estamos constreñidos por factores exteriores que condicionan nuestras posibilidades de ofrecer alternativas». AHFPI, PSOE, “Estrategia económica del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1411, p. 3. Aquel documento aprobado por la CEF del PSOE había sido diseñado en unas *jornadas de economía* organizadas por la Secretaría de Estudios y Programas unos meses antes. En este sentido consúltese también, AHFPI, PSOE, Secretaría de Estudios y Programas, “La estrategia económica socialista”, Madrid, 1980?, sig. Fc 385.

⁴³⁹ AHFPI, PSOE, “Estrategia económica del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1411, p. 3. Véanse desde la órbita socialista las siguientes aportaciones de, MUÑIZ, Miguel, “La estrategia económica..., *op.cit.*; SÁNCHEZ AYUSO, Manuel, “En torno al programa económico socialista”, *Leviatán*, nº 7, (1982), pp. 59-80.

⁴⁴⁰ AHFPI, PSOE, “Estrategia económica del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1411, p. 4.

⁴⁴¹ AHFPI, PSOE, “Estrategia económica del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1411, pp. 15-ss.

una serie de matices subrayados por los propios economistas socialistas que ponían en evidencia una moderación programática, o, si prefiere un realismo político ante la correlación de fuerzas entre capital-trabajo que a principios de los ochenta se vislumbra sin mayores contratiempos. ¿En qué consistían aquellos *matices*? En lo fundamental en uno: la preeminencia del sector privado como motor de crecimiento económico. Aspecto éste que más tenía que ver con un posicionamiento liberal que estrictamente socialdemócrata. Y que venía a sintetizarse en que para salir de la crisis y “[c]ontrarrestar los efectos de índole estructural ligados a la evolución de las economías de mercado”, buena parte de la solución estaba en fomentar la “inversión privada”⁴⁴². Condición para lo anterior era una *actitud positiva* por parte de la clase obrera de cara a evitar “bloqueos [...] del desarrollo de ciertos sectores o la adaptación de los que están en crisis a las condiciones que impone el mercado”⁴⁴³. A la postre este documento, junto con otros tantos ya reseñados, estaban marcando la orientación del futuro programa económico socialista. También su misma aprobación y publicación por la organización indicaba un cambio de correlación de fuerzas dentro de los cuadros medios y altos cargos, en donde el Grupo Federal de Economistas del PSOE de la mano de Miguel Boyer y de Carlos Solchaga, bajo la dirección de Felipe González, tendría una especial y determinante importancia⁴⁴⁴.

Una estrategia que se vería continuada mayoritariamente en las tesis económicas del XXIX cuando se diera paso a lo que se conocería como “política económica de corte progresista”. Con ser relevante esta modificación última en lo que se refiere a los postulados centrales del proyecto socialdemócrata, el paso que se dará en pocos meses a la hora de redactar el programa electoral socialista será mayúsculo. Valga tan sólo un extracto de la ponencia socio-económica de aquel veintinueve congreso para tratar de entender el citado paso cualitativo al que nos estamos refiriendo:

«En este clima no es posible la adopción de posiciones neoliberales para la salida de la crisis en España. Ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, sería capaz de controlar el clima de desorden económico que tal tipo de política produciría. Ningún partido político, desde posiciones progresistas, podría contemplar el enorme coste social que ese reajuste produciría en forma de desempleo, pero, por encima de consideraciones políticas y morales, al margen de las mismas, hay, sobre todo, razones para pensar que el sistema productivo español, dejando al paio de su propia reindustrialización, habría que sufrir un impacto tan fuerte que sectores enteros entrarían en bancarrota sin horizonte previsible de recuperación»⁴⁴⁵.

Como se viene destacando en los meses que medían de la salida del XXIX Congreso socialista en junio de 1981 a la elaboración, aprobación y presentación definitiva del programa electoral, se produce la gran metamorfosis en este campo. Se asiste al nacimiento de una nueva concepción de la política económica. Y no eran cambios menores, sino de fondo, de contenido, de concepción. Se volvía a repetir la historia de elecciones anteriores: los documentos

⁴⁴² AHFPI, PSOE, “Estrategia económica del PSOE”, Madrid, 1980, sig. Fa 1411, p. 53. El propio Miguel Muñiz señalaría al respecto del citado documento: «[E]l mercado, como mecanismo de asignación de recursos, tiene un inestimable valor de información y decisión en el funcionamiento de la economía, garantizando la libre elección del consumidor entre diversas alternativas [...]. Por ello, debe afirmarse su actuación; siendo preciso liberar su funcionamiento de las trabas y obstáculos impuestos por los intereses de los centros de poder económico». MUÑIZ, Miguel, “La estrategia económica..., *op.cit.*, p. 26.

⁴⁴³ *Ibíd.*, p. 27.

⁴⁴⁴ Véase el Capítulo “5. Gabinetes «tecnocráticos» y «liberales» para los nuevos tiempos”.

⁴⁴⁵ AHFPI, PSOE, “Anexo del acta del 29º Congreso. Política socio-económica. Sindicalismo y cooperativismo”, Madrid, 1981, sig. Fa 1306, p. 8. Asimismo aquel extenso documento contenía una serie de interesantes apartados –junto a los ya mencionados– y que se verían ampliados y concretados en los siguientes meses según avanzaba la elaboración del futuro programa electoral socialista. A destacar: “6. Política monetaria y el sistema financiero”; “7. Relaciones comerciales y cambios en la visión internacional del trabajo”. Y en concreto, el epígrafe tercero –*Los mecanismos de distribución de un excedente escaso*– esbozaba un conjunto de planteamientos en torno al *poder sindical* y la *democracia industrial* o al *reforzamiento del sector público* que se verían constreñidos en poco tiempo.

electorales quedaban muy por *delante* o si se prefiere muy escorados a la derecha, con respecto a las tesis aprobadas por los órganos de dirección. Así el equipo electoral encargado de la redacción venía a constituirse en la “vanguardia” socialista (con el no gratuito añadido de “liberal”) por excelencia. Observemos en qué consistieron algunos de estos cambios, que respondía tanto a la transformación ideológica socialista como a la implantación de un nuevo paradigma ahora ya hegemónico en lo económico dentro del PSOE.

Un primer cambio de notables consecuencias procedía del propio *falso equilibrio* que mantenía el propio programa electoral entre la defensa de la inversión pública, a través del Estado –en base a la posturas tradicionales de la tradición socialdemócrata– y el lugar ahora a ocupar por el sector privado. En donde antes el sector público estaba destinado a ser el motor de crecimiento de forma privilegiada, ahora tendría que compartir tal tarea con el sector privado. Primera concesión. “El sector empresarial ha sido, y seguirá siendo en el futuro, un importante protagonista de la actividad económica” se recalca. Aunque se reconocía que tenía “resolver los graves problemas que le aquejan” –muchos de ellos derivados de las relaciones paternalistas Estado-empresarios durante el franquismo– el PSOE se comprometía a “prestar el máximo apoyo en la búsqueda de un sistema eficiente y adecuado a las necesidades que la sociedad española demanda”⁴⁴⁶. No era tan poco baladí que la preocupación por la empresa privada, por más que se introdujera algún que otra propuesta menor en referencia a una posible y saludable democratización de la vida empresarial, ocupara el primer lugar del programa socialista en este aspecto⁴⁴⁷. Mucho antes ya se había dejado claro que en base al objetivo prioritario de crear empleo la “inversión privada [es] la determinante en el volumen de creación de empleos” por más que se enajenara el consiguiente y oportuno matiz de que la “inversión pública actuará como motor de la economía”⁴⁴⁸. Propuestas todas ellas acompañadas de no pocas medidas suplementarias e inclusive *generosas*⁴⁴⁹.

Más allá de las consecuencias de fondo de tales afirmaciones, o mejor dicho de propuestas electorales, se estaba ante un claro ejemplo de adaptación del “lenguaje managerial”, por parte de los socialistas con el fin declarado de tranquilizar por este flanco a las clases dominantes. Igualmente no faltaron las oportunas formulaciones retóricas con las que enjuagar aquello de la mejor de las maneras posibles: “Nuestro programa, ataca estos problemas de forma armónica y equilibrada, teniendo como objetivo prioritario la creación del empleo”⁴⁵⁰. Y no sólo, pues,

«[e]l programa socialista no se basa sólo en un mero crecimiento económico y economicista, sino que lo conjuga con el aumento de la calidad de vida, la mayor independencia nacional y con una mayor libertad y justicia»⁴⁵¹.

⁴⁴⁶ PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 14. Se hablaba allí de apostar por una «empresa en una sociedad democrática»; «[d]emocratizar las estructuras de poder de las empresas con objeto de conquistar progresivamente la económica y social»; «reforma del sistema financiero orientado a potenciar el endeudamiento a medio y largo plazo de las empresas y a moderar el coste de los créditos». *Ibídem*.

⁴⁴⁷ Asimismo se insistía a continuación en el necesario apoyo a la pequeña y mediana empresa, verdadero «soporte para el sistema democrático». Señalando: «[E]l PSOE considera un objetivo prioritario la modernización, mejora de la eficacia e incremento de la competitividad en las pequeñas y medianas empresas». *Ibídem*, p. 15.

⁴⁴⁸ *Ibídem*, p. 7.

⁴⁴⁹ «La actual carga que las cotizaciones de la Seguridad Social supone para las empresas una barrera para la creación de puestos de trabajo. Por ello, se duplicará la aportación actual del Estado reduciendo en un veinte por ciento la cotización empresarial. Las cotizaciones tenderán a ser proporcionales al total de remuneraciones salariales». *Ibídem*, p. 8.

⁴⁵⁰ *Ibídem*, p. 6.

⁴⁵¹ *Ibídem*. Una ampliación de estas cuestiones con sus consiguientes especificaciones en un tono académico en, MUÑOZ, Juan y ROLDÁN, Santiago, “Estrategia económica y la lucha contra el paro”, *Leviatán*, nº 9, (1982), 47-56.

En segundo lugar, y en la búsqueda de este objetivo prioritario, el propio programa electoral ofrecería algunas claves de lo que, posteriormente, se convertiría en la estrategia de modernización económica de los ejecutivos socialista. Estrategia que se sintetizaría en la puesta en marcha de la *nueva lógica del mercado*. Así se evita “tocar” temas sensibles de forma abierta, predominando la total ambigüedad, por ejemplo, en lo que se refiere al sector industrial público de la mano del INI⁴⁵². Aquella *lógica* no sólo iba contra cualquier posicionamiento socialdemócrata, sino que conllevaba la aceptación de unos nuevos presupuestos político-ideológicos más propios de la derecha liberal política que de una izquierda entonces autodefinida ya de *progresista*.

Las prioridades cambiaban de orden. No era la primera vez. Ahora bien, esta *nueva orientación* iba a ser la definitiva. No era tan sólo que el único motor de crecimiento realmente fiable fuera el proveniente del sector del capital privado, de cara a llevar adelante la modernización de la estructura productiva con el fin de hacer la economía española competitiva a nivel internacional; sino es que los aspectos más comprometidos de anteriores programas socialistas quedaban vaciados de contenido.

Tres ejemplos en otros tantos aspectos claves serán lo suficientemente aclaratorios. El primero es de especial significado: la ausencia de promesas de grandes o pequeñas nacionalizaciones. Así pues, se pasaba de plantear de nacionalizar la “red de transporte de energía eléctrica de alta tensión”⁴⁵³ para hablar sin concretar de “[c]onstruir una empresa con mayoría de capital público para explotar, en régimen de propiedad, el monopolio nacional de la red primaria de transporte de energía eléctrica”⁴⁵⁴. Segundo, la política financiera. Si hasta entonces se había tratado de marcar diferencias, aunque fuera en el terreno de la propaganda o en el teórico con la política económica implantada en 1977 a raíz de la firma de los Pactos de la Moncloa, ahora se asumían –sin prejuicios– sus consecuencias. En otras palabras, se aceptaba en la práctica la *concepción liberal* de una política financiera, hija del desarrollismo español franquista, aunque eso sí se advertía de que es “necesario plantear una nueva política que corrija los efectos menos deseados de la liberalización”, o que se trataría de evitar el “desmantelamiento de nuestra industria por la aplicación de una política liberal pura”⁴⁵⁵. Así quedaban expresados los límites de la política socialdemócrata. Tercero, la política bancaria. Aquí sí que el salto dado era notable. Lejísimos parecían los tiempos cuando se hablaba de alcanzar un “área nacionalizada de propiedad estatal que estaría formada por el crédito oficial”⁴⁵⁶. No habían pasado dos años escasos. “1. Se procurará que la Banca recupere su papel de gran inversor y promotor en el sector industrial y de servicios” se leía en el programa electoral como el primer punto referido a la Banca tanto pública como privada⁴⁵⁷. Por este lado

⁴⁵² Evitando el empleo del vocablo ‘desindustrialización’ en todo lo relacionado con la política industrial del PSOE, se hacía mención a la necesidad de contemplar «un ajuste positivo e integral de modo que la asignación de recursos para la reindustrialización se realice integrando las tareas de reestructuración, reconversión y creación de nuevas actividades industriales». Lo anterior estaría condicionado por un «diseño de la política [...] [que] no puede realizarse al margen de las exigencias del mercado». Ahora bien, cuando se habla de la *empresa pública* así como de *compromiso con los propios trabajadores* directamente ya se incide en cómo «[e]l PSOE no desea mantener empresas públicas sin potencial de desarrollo a largo plazo. Sin embargo el coste social y económico derivado de su reconversión no debe recaer exclusivamente sobre los trabajadores». Clarificando más adelante como las «[e]mpresas concurrenciales agrupadas en torno al INI, cuyo objetivo será el desarrollo de la actividad económica de acuerdo con los criterios que rigen la economía de mercado». PSOE, *Por el cambio...*, op.cit., pp. 8 y 19, respectivamente.

⁴⁵³ PSOE, *Programa Elecciones 79...*, op.cit., p. 9.

⁴⁵⁴ PSOE, *Por el cambio...*, op.cit., p. 12.

⁴⁵⁵ *Ibíd.*, p. 15.

⁴⁵⁶ PSOE, *Programa Elecciones 79...*, op.cit., p. 6.

⁴⁵⁷ PSOE, *Por el cambio...*, op.cit., p. 15.

pocas dudas cabían acerca de donde se dirigía el programa socialista: tranquilizar, de nuevo, a la *clase empresarial*. Precisamente en este aspecto concreto, pesó de forma sobresaliente la fracasada experiencia del proyecto socialista de Mitterrand⁴⁵⁸. Una calculada respuesta “para evitar las huidas de capitales y los primeros problemas que estaban haciendo tambalear el nuevo gobierno socialista de Francia”⁴⁵⁹.

Se combinarían aquellas medidas claramente liberales con promesas socialdemócratas y progresistas de cara a la clase media. Más allá de las consabidas propuestas democratizadoras con el objetivo implícito de mantener el “orden burgués” –como hubiera gustado decir a los socialistas unos años antes– aquellas *otras medidas* no podían venir de otro lugar que no fuera a partir de una oferta de reforma tributaria, que bajo previa declaración de intenciones de izquierdas, presentaba una batería de propuestas tendentes a alcanzar la progresividad fiscal y concretamente a terminar con las *situaciones de privilegio*⁴⁶⁰. Asimismo, la lucha contra la inflación –a partir de una lectura progresista– también estaba más que presente de cara a atraerse a la clase obrera y a la clase media⁴⁶¹.

De todas estas imprecisiones saldría lo que los socialistas plantearían como una *planificación económica* concertada con los calificativos gratuitos de “racional” y “democrática”, en donde cada “agente social” tendría que asumir un conjunto de *responsabilidades*⁴⁶². Por más que se hablara de que “es fundamental avanzar hacia una

⁴⁵⁸ De hecho, la organización pondría en marcha una ambiciosa comisión –denominada como *taller de seguimiento*– para el estudio del desarrollo del programa socialista del gobierno socialista de Mitterrand. Como ha recordado Joaquín Almunia, «cada mes teníamos un informe encima de la mesa hecho por un miembro de los servicio de la Ejecutiva del partido que seguía día a día la experiencia de los franceses». Declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 325. Véase también las declaraciones de Carlos Solchaga a, *ibídem*, p. 325. Por lo demás consúltense dentro de, AHFFLC, PSOE, Secretaría Ejecutiva Federal, “Informes (1982-1984)”, sig. AI-136-06. Concretamente: PSOE-CEF, Área de Estudios y Programas, “Algunos criterios y práctica de precios y tarifas en el proyecto gubernamental francés. Taller de seguimiento”, Madrid, abril de 1982; PSOE-CEF, Secretaría de Estudios y Programas, “La ‘segunda fase’ en la política económica del gobierno Mitterrand. Taller de seguimiento”, Madrid, junio-julio de 1982; PSOE-CEF, Área de Estudios y Programas, “PSF: los efectos internos de la segunda fase. Taller de seguimiento”, Madrid, agosto de 1982; PSOE-CEF, Área de Estudios y Programas, “Informe sobre la situación francesa”, Madrid, noviembre de 1984. Por último, Charles Powell ha señalado como esta fracasada experiencia devendría en fundamental en la posterior toma de decisiones de los encargados del programa económico socialista: «[L]a experiencia francesa fue de gran utilidad al equipo económico del gobierno a afectos pedagógicos internos, proporcionándole nuevos argumentos en contra de las políticas fiscales y monetarias expansivas tradicionalmente defendidas por amplios sectores del partido». POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 344. Véase, por lo demás, el relevante como ilustrador estudio comparativo firmado por, SMITH, W. Rand, *The left's dirty...*, *op.cit.*.

⁴⁵⁹ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, p. 246. Véase asimismo: GOMÁRIZ, Enrique, “El ejemplo francés”, *Leviatán*, n° 5, (1981), pp. 55-62. Por lo demás, y de forma retrospectiva, consúltense: BELL, David S., *The French Socialist Party. The emergence of a Party of Government*, London, Oxford University Press, 1984; y, CUENCA TORIBIO, José Manuel, “Felipismo y Mitterrandismo, un paralelo”, *Hispania*, vol. LI/3, n° 179, (1991), pp. 1095-1102.

⁴⁶⁰ «La política tributaria socialista tiene como objetivo el convertir en realidad el principio constitucional de que cada ciudadano pague sus impuestos de acuerdo con su capacidad económica». Igualmente se podía leer como una de las propuestas centrales –tras las medidas contra el fraude y la creación de un todavía muy débil sistema fiscal– estaría fundamentada en la búsqueda de «[u]na mayor progresividad de la tarifa acompañada de la supresión de los frenos que la limitan, para evitar la injustificable situación fiscal de las rentas y patrimonios altos». PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 18.

⁴⁶¹ Véase epígrafes “I. 4.3. Política de precios” y “I. 4.4. La política monetaria”. *Ibídem*, p. 15.

⁴⁶² «Un reparto claro de responsabilidades entre el sector empresarial y el Estado con el objeto de que las acciones entre uno y otro sector se refuercen y no se obstaculicen, parece hoy día más necesario que nunca». *Ibídem*, p. 8.

«economía concertada» en la que exista un importante sector de mercado con una clase empresarial dinámica, un sector público eficiente y unos sindicatos fuertes”, la propia jerarquización en la presentación de los actores dejaba entrever hacia donde se caminaba con paso firme⁴⁶³.

En esta tesitura, el Estado adquiere una función básica con el objeto de asegurar el crecimiento económico: reducir las incertidumbres que rodean a la economía de mercado mediante una política de racionalización, que permitiera a su vez contener los posibles desequilibrios económicos y sociales que llegado el caso pudieran impedir la *salida de la crisis*. Asimismo, a los sindicatos se les demandaba ser co-responsables con el proceso de *planificación concertada*, a través de las negociaciones que pudieran darse a la hora de asumir los nuevos retos modernizadores. La contraparte ofrecida consistiría en iniciar una serie de medidas con un claro sentido democratizador de las relaciones laborales, que, a corto y medio plazo, conllevaría el *fortalecimiento* de las organizaciones obreras⁴⁶⁴. A lo que se añadía la introducción en la legislación laboral de algunas de las metas históricas del movimiento obrero como la jornada laboral de cuarenta horas o los “30 días [de] vacaciones anuales”. Se decía más. Pues “[s]e mantendrá [...], el objetivo de las 35 horas, al que deberá tenderse a través de las negociaciones colectivas, que deberán avanzar hacia la consecución de la quinta semana de vacaciones”⁴⁶⁵.

También estaba meridianamente claro en las mentes de los dirigentes que el tránsito modernizador no sería sencillo. Con el fin de conquistar la deseada “paz social” se ofrecía el *palo* y la *zanahoria* a los sindicatos: el recurso del patrimonio histórico sindical y la posible “externalización” de las subvenciones en materia de formación. Medidas que por más que fueran legítimas –por ejemplo, reforzar la “autonomía sindical”⁴⁶⁶– no dejaban de ser una clara contraoferta. Aquí el PSOE se jugaba, según sus cálculos, buena parte del voto obrero no estrictamente socialista.

Por último, en lo que respecta al capital privado se le encomienda una función concreta y sencilla: “la inversión privada [es] la determinante en el volumen de la creación de empleos”. Todo ello a través de un,

⁴⁶³ *Ibídem*.

⁴⁶⁴ Entre otras, *derecho de huelga, regulación de los conflictos colectivos, libertad sindical, negociación colectiva*. Véase apartado “I. 5. Las relaciones laborales” en, PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, pp. 19-20. Precisamente a su análisis está destinado en su práctica totalidad el epígrafe “IV. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”.

⁴⁶⁵ *Ibídem*, p. 8. Junto a estas medidas también se apostaba –desde una perspectiva en extremo moderada a la par que medida– por ejemplo, por la *negociación colectiva* orientada a fijar «la banda salarial en torno a la inflación prevista» a la par que «garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios». Por último véase también el apartado “II. 2. Protección a los desempleados” donde se recordaba, de entrada, como el «70 por 100 de los parados» carecían de cobertura, «y lo que es más grave, se está operando un deterioro creciente de las tasas de cobertura». Sin duda la propuesta más importante, junto con el incremento de la duración de las prestaciones o la mejora del funcionamiento administrativo de las propias instituciones públicas encargadas, residía en la promesa de incrementar el «nivel contributivo del seguro de desempleo [lo que] incluirá diversos colectivos hoy desprotegidos». *Ibídem*, pp. 7 y 23, respectivamente.

⁴⁶⁶ Tras resaltar el «papel primordial en nuestra sociedad» que juegan los sindicatos se pasaba a afirmar como «los socialistas procederemos a la solución definitiva [conquista de la autonomía sindical], adoptándose las medidas ejecutivas y normas jurídicas necesarias, del problema del patrimonio sindical, así como al establecimiento de convenios bilaterales entre el Gobierno y los sindicatos para la participación de éstos en campos como la educación, formación profesional, prestación de servicios ocio y descanso de los trabajadores y cuadros sindicales, y para el mantenimiento de centros educativos y de formación a cargo de las centrales sindicales». PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 21.

«plan concertado que elimine incertidumbres de tipo institucional y de política económica; la moderación de costes, tantos salariales como de seguridad social y financieros; el establecimiento de canales de financiación a largo plazo; el ahorro de costes de energía y el control de la inflación»⁴⁶⁷.

Establecidas las diferentes responsabilidades y el marco de juego en el que se desarrollarían, el programa socialista afrontaría el principal problema del país junto con la consolidación de la democracia: el desempleo. Tema central de todos y cada uno de los partidos en liza⁴⁶⁸. En este sentido, deben destacarse dos cuestiones no menores que, posteriormente, tendrán una extraordinaria importancia. La primera de ellas fue el compromiso del PSOE de crear 800.000 empleos en los cuatro años siguientes:

«La creación de puestos de trabajo es el principal reto al que ha de enfrentarse la sociedad española durante los próximos cuatro años. Por ello, el empleo es el objetivo prioritario del programa socialista. Es necesario crear puestos de trabajo para los más de dos millones de parados que existen en la actualidad. Y también se requieren puestos de trabajo para los jóvenes y mujeres que acuden por primera vez a solicitar su ingreso en la vida laboral. Para ello, el PSOE propone crear más de 800.000 puestos de empleos netos durante los cuatro años de gestión gubernamental»⁴⁶⁹.

Esta siempre recordada medida que sería calificada como *populista* e incluso *demagógica* por el resto de las fuerzas electorales, por el contrario, tiene otro punto de interés tanto por la dimensión de la propuesta como por la forma en que se concibió. Si hasta el momento se ha destacado como la organización socialista había venido preparando paciente y meticulosamente el programa electoral en su conjunto, en cambio, esta propuesta sería incorporada a última hora por petición expresa de la UGT. El que fuera futuro Ministro de Economía, Miguel Boyer, relaciona no sin cierta parte de razón este asunto, primero –y a pesar de lo mencionado– con las lecciones no aprendidas del fracaso del socialismo francés, y segundo, con la futura división entre Partido y Gobierno, en tanto “ninguno, salvo Almunia, de los que tuvimos responsabilidades de gobierno estuvo en la confección por el partido del programa”⁴⁷⁰.

⁴⁶⁷ PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, pp. 7-10. Véase también en aquella coyuntura el interesante alegato de, FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Miguel Ángel, “La democracia necesita empresarios”, *Leviatán*, nº 7, (1982), pp. 53-58.

⁴⁶⁸ Los programas electorales de las grandes formaciones prestaron una especial atención al asunto del empleo/desempleo. El PSOE dedicó a la citada cuestión el 35% de su programa, UCD el 32%, AP el 31%, PCE el 21% y el CDS el 25%. Cada uno de los grandes partidos planteó su particular forma de resolver el primer problema económico de la nación. A excepción del PCE y con algunos matices el PSOE, el resto apostarían claramente por la *nueva lógica del mercado*. Para AP la clave estribaría en reducir el déficit público y fomentar la actividad privada para asegurar la recuperación económica y a partir de ahí se crearían los empleos; la UCD, por otro lado, insistía también en el principio de fomentar la actividad del capital privado con las necesarias reformas del mercado de trabajo de cara a eliminar las *consabidas* rigideces del ordenamiento jurídico-laboral; el PCE llegaría aún más lejos que el PSOE al prometer la creación de un millón de empleos a través de la reactivación del sector público. Véase aquí, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, *La estrategia de...*, *op.cit.* por lo demás, como se verá a lo largo del III Epígrafe la *salida* por la que optarían los socialista en el poder se asemejaría con notable similitud con la propuesta de AP.

⁴⁶⁹ PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 7. Véase también, Noticia, “Felipe González mantiene el objetivo de crear 800.000 empleos en cuatro años y reducir la inflación en 1983”, *El País*, 1 de diciembre de 1982.

⁴⁷⁰ Declaraciones de Miguel Boyer a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 303. Añadiendo, «ese programa del ochenta y dos tuvo tantos problemas que González descafeinó por completo el de las siguientes elecciones». *Ibidem*. Véanse aquí las reflexiones personales del citado protagonista en, BOYER, Miguel, “El segundo ajuste económico de la democracia española (diciembre de 1982-julio de 1985)” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, *op.cit.*, vol. VIII.

Muy pronto se mostraría la imposibilidad de llevarla a cabo, a pesar de que no dejaron de presentarse análisis voluntariosos que mantendrían su *fe* en su cumplimiento⁴⁷¹. Ahora bien, la promesa de la creación de los 800.000 empleos prometidos no sólo es que se realizara sin estudio técnico previo, sino que como destacó, a posteriori, el coordinador del programa electoral y futuro Ministro de Trabajo, Joaquín Almunia,

«[e]se compromiso se añadió, digamos, como una ‘guinda’, por motivos electorales, no podríamos salir diciendo otra cosa. Se incluyó por ingenuidad, por voluntarismo, por demagogia [...] una mezcla de todo. Necesitábamos salir asegurando que nosotros íbamos a conseguir que el paro se reduciría en los primeros cuatro años»⁴⁷².

El incumplimiento de dicho compromiso como reconocería el segundo Ministro de Trabajo de los gobiernos socialistas, Manuel Chaves, “también pudo dañar la credibilidad del Gobierno” durante las siguientes legislaturas⁴⁷³.

La segunda cuestión sobre la que es imprescindible detenerse por la importancia que va adquirir en un breve tiempo, es el modelo de relaciones laborales propuesto en el programa electoral socialista “Por el Cambio”. Aunque el Estatuto de los Trabajadores se aprobaría finalmente en marzo de 1980, tras superar muchas de las inercias provenientes del franquismo, e iniciada la apertura de un titubeante proceso de concertación social; reconstruir un marco de relaciones laborales democrático continuaba figurando entre los principales objetivos de una fuerza política de izquierdas, que se seguía considerando heredera de las luchas protagonizadas por el movimiento obrero. Cuestión que, con más o menos entusiasmo, ya se había planteado en el programa electoral de 1979. Pero las cosas habían cambiado. Simplificando. No se hablaba de objetivos de clase ni de modificar los mecanismos de reproducción. Lo más políticamente correcto lo dominaba todo por más que se acompañara, posteriormente, de medidas de notable relevancia:

⁴⁷¹ La propuesta introducida a petición de UGT a última hora y con un carácter meramente electoralista, seguiría siendo defendida por el CEC de la UGT en un *informe de gestión* en el año 1984, cuando las cifras de desempleo alcanzaban cuotas máximas y la profunda situación de crisis económica mostraba, sin tapujos, la imposibilidad *de facto* de cumplir tal objetivo. En el citado informe se seguía manteniendo lo acertado del planteamiento de aquella propuesta, señalando como a pesar de las dificultades económicas el mismo no debía ser abandonado: «En este sentido mantenemos que los 800.000 puestos de trabajo prometidos no era una cifra cabalística, sino un objetivo apoyado por el partido socialista y la UGT que, independientemente de las dificultades y revisiones que imponen las dificultades [...] de la realidad económica, no puede dejar de ser guía y meta principal de la política económica del gobierno. La realidad puede, tal vez, frustrar la plena consecución del objetivo, y debemos admitir con franqueza la práctica imposibilidad de lograrlo en la presente legislatura, pero nunca debe alterar el intento prioritario de lograrlo”. AHFFLC, UGT-CEC, “Informe de Gestión que presenta la CEC al II Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 29 y 30 de junio de 1984, sig. 002606-003, p. 22 [*subrayado* en el original]. Por lo demás, las críticas cuando las hubo por parte de la UGT al programa socialista fueron de carácter moderado, aunque muchas de ellas cuestionarían –acertadamente como el paso tiempo demostraría– numerosos puntos frágiles de lo que se iba a convertir en la futura guía de gobierno. Un caso específico en: AHFFLC, Fondo Zufiaur, José María Zufiaur, Informe, “Observaciones al programa electoral”, 6 de septiembre de 1982, sig. 001635-006. Esta misma cuestión se abordará desde diferentes ángulos en el Epígrafe “III. Los ejecutivos socialistas y la reestructuración del modelo capitalista español (1982-1992)” y en el Epígrafe “IV. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”.

⁴⁷² Declaraciones de Joaquín Almunia a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 167.

⁴⁷³ Declaraciones de Manuel Chaves en, *ibídem*, p. 327. Así mismo debe atenderse al testimonio de Alfonso Guerra. Todo ello a través de un discurso más *justificativo* que *explicativo* que en lo básico coincide con las palabras de Manuel Chaves: «Es curioso que pasado el tiempo sus responsables quieran descargar sobre decisiones políticas, que me atribuyen a mí, las propuestas cuyo balance resultaron más polémicas, como la creación de 800.00 puestos de trabajo, como si no fuese la cifra que nos dieron los técnicos». GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, *op.cit.*, p. 331.

«El programa socialista de medidas laborales y sindicales pretende posibilitar y facilitar un cambio en profundidad en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, en una sociedad que presenta para ellas rasgos injustos y discriminatorios»⁴⁷⁴.

Más allá de estos aspectos que serán tratados con detenimiento en siguientes apartados⁴⁷⁵, también no es de interés conocer las principales propuestas en materia de contratación, verdadera punta de lanza de las posteriores reformas laborales. El PSOE mantenía una vez más en lo teórico la que había su apuesta desde el inicio de la transición: la contratación indefinida como vía de acceso predominante al mercado de trabajo. Claro está, al igual que sucedía en cada propuesta, que luego venía el matiz correspondiente con el que se pretendía contentar a todos los potenciales electores. De este modo, en pequeñas dosis se dejaban las puertas abiertas a cualquier modificación –del grado que fuera– en los sucesivos apartados del citado *programa*. Así en una parte del programa se podía leer como los empresarios “deben [de] disponer de una cierta flexibilidad en la contratación de los trabajadores”⁴⁷⁶ y en otra que, “[l]os contratos temporales constituirán un recurso excepcional, evitándose que representen para algunos colectivos la única vía posible de acceso a un trabajo remunerado”⁴⁷⁷.

No terminaría aquí la transformación programática del proyecto socialista de gobierno. En un aspecto tan importante para el PSOE como era su identificación con una clase social se daba un último paso de calado. Si en el XXIX Congreso había pasado de considerarse el legítimo representante de los intereses de la clase obrera y/o trabajadora –según los *ánimos* de cada momento político– a luchar por la consecución de un nuevo *bloque social mayoritario*, ahora se procedía a una nueva conceptualización: el *bloque social progresista*. En este inusitado avance hacia la desideologización no se hablaba de clases. Y ahí aparece el *nuevo sujeto histórico* del proyecto socialista: el ciudadano y la ciudadana⁴⁷⁸. No se pierde la ocasión, además, de vincular este sujeto social con una serie de derechos y obligaciones que abren, en suma, un más que novedoso marco de conceptualización –o si se prefiere desestructuración de los cánones del pensamiento socialista clásico– de las relaciones capital-trabajo.

Léase con atención: “La consideración del trabajador como ciudadano, tanto fuera como dentro del centro de trabajo, por lo que el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, individuales y colectivos, debe ser garantizado dentro de la empresa”. Y ello con el siguiente matiz: “compatibilizado con el normal proceso de producción”.

Las medidas contempladas para la modificación del marco de relaciones laborales, una vez establecidos estos puntos de partida dicotómicos con la tradición socialista –a saber el paso del obrero fabril al ciudadano como punta de lanza de los impulsos modernizadores– estarían guiados por el afán de garantizar y potenciar “la buena marcha de la empresa y de la producción, al mismo tiempo que implican un serio intento de democratizar la vida en la

⁴⁷⁴ PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 19.

⁴⁷⁵ Nos remitimos nuevamente al Epígrafe “ IV. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”.

⁴⁷⁶ PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 20.

⁴⁷⁷ *Ibídem*, p. 8. Por otro lado se decía que se «modificará la regulación de la contratación laboral para asegurar el control sindical y administrativo de su aplicación a los distintos supuestos». Y lo más importante: «Además, se favorecerá la conversión de los contratos especiales en ordinarios». *Ibídem*. De hecho se presentaban muchas de las figuras que tendrán un protagonismo central con la aprobación de la Ley 32/1984, 2 de agosto, *sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores*. A saber: el contrato de relevo, los contratos a tiempo parcial, los contratos en práctica y para la formación. La repetición en más de una ocasión de similares propuestas a lo largo del mismo programa es evidente. Véanse: “I.– El funcionamiento del mercado de trabajo” y “I.5.1.2. Relaciones laborales individuales”. *Ibídem*, pp. 8 y 20, respectivamente.

⁴⁷⁸ Véase aquí lo apuntado tanto en la *Presentación* como en el Capítulo “3. A vueltas con la historia social: debates, controversias y dilemas del historiador social hoy en España”.

misma”⁴⁷⁹. Como *addenda* se señalaba, una vez más, como “la modificación en un sentido más democrático de las relaciones laborales, requiere el fortalecimiento de los sindicatos, a lo cual no pueden permanecer ajenos a los poderes públicos”⁴⁸⁰.

Continuemos. La transformación que aquí se produce dentro de la concepción socialista es, a buen a seguro, la más radical –adjetivo sin las recurrentes comillas o las oportunas cursivas de turno– de todas las mencionadas hasta aquí. No es para menos, pues el significado de la *cuestión social* de la que hablara largo y tendido Robert Castel, comenzaría su *metamorfosis* definitiva a finales de los años setenta en la mayoría de los países europeos⁴⁸¹. Como destacó en su día el Andrés Bilbao, la conversión del trabajador en ciudadano, implicó un giro de 180° para cualquier proyecto ubicado en la izquierda ya sea *moderada*, *radical* o sencillamente *sectaria*⁴⁸².

Así pues, desaparece en el plano formal programático la que hasta entonces había sido considerada la principal contradicción: las relaciones capital-trabajo. A saber: las desigualdades económicas y sociales estructurales de la sociedad capitalista, y con ello, los antes remarcados *objetivos de clase*. En todo caso, no se dejaría de subrayar en el mismo programa que la salida a la crisis estaría basada en la *solidaridad*, así como en el reparto de los costes que acarrearán las políticas modernizadoras previstas⁴⁸³. En buena medida la llamada a la solidaridad, ya no *de clase* lógicamente, vendría a constituirse en el soporte colectivo y societal del impulso modernizador.

Visto lo visto, por tanto, el programa electoral titulado *Por el cambio* se limitaría, pues, a asumir las “esperanzas de modernización” que los ciudadanos reclamaban. El “PSOE, partido de la modernización” reflejaba anhelos de la sociedad española en su conjunto. Todo ello en un panorama electoral marcado por la ausencia de una competición política real, tanto por la crisis por la que atravesaban los partidos de la derecha como de la izquierda. Por este mismo, camino el “discurso del cambio” transmitiría un mensaje de seguridad y de compromiso en un momento de profunda inestabilidad política.

Tal como argumentaría los líderes socialistas no se trataba tanto de que el PSOE hubiera *cambiado*, sino que ante la falta de un proyecto de gobierno viable, la organización socialista asumía el proyecto que “la historia les había encomendado”. Cuestiones que tuvieron un notable reflejo, tanto en las propuestas programáticas como en la forma y el estilo de gobernar en la que el cambio poco tuvo de “ruptura” y mucho de “continuidad”. Así el programa socialista pondría un especial empeño en no entorpecer el previsible triunfo electoral que le otorgaban la mayor parte de las encuestas, al mismo tiempo que trataba de “dar esperanzas a todos y no contrariar a nadie”⁴⁸⁴.

Aplazados los objetivos finales del socialismo español *sine die*, se conseguiría combinar una propuesta en la que entremezclaba el proyecto de modernización –la *revolución burguesa*– a la vez que se planteaba un conjunto de medidas que ofrecían la imagen de un PSOE que seguía siendo de izquierdas⁴⁸⁵. En este sentido, el “PSOE, partido de la modernización” no

⁴⁷⁹ PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 19.

⁴⁸⁰ *Ibidem*.

⁴⁸¹ CASTEL, Robert, *Las metamorfosis de...*, *op.cit.*.

⁴⁸² BILBAO, Andrés, *Obreros y ciudadanos...*, *op.cit.*, p. 10.

⁴⁸³ Algunos ejemplos contenidos en el citado programa electoral: «Para ese objetivo [800.000 empleos netos] se adoptarán políticas específicas de empleo que, a través de la solidaridad de los que ya cuentan con un puesto de trabajo, permitan reducir la edad de jubilación, reducir la jornada de trabajo y escolarizar el máximo número de posible de jóvenes». PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 7.

⁴⁸⁴ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, p. 426.

⁴⁸⁵ Las actuaciones en materia económica una vez en el Gobierno marcarían el abismal espacio que separaba a los socialistas históricos del nuevo socialismo, como se encargaría de señalar agudamente el profesor, FUSI, Juan Pablo, “El PSOE de ayer y de hoy”, *Diario 16*, 4 de febrero de 1985.

cuestionaba la economía de mercado como el escenario en el que una vez realizada la “misión histórica” –la consolidación de la democracia y la reestructuración del capitalismo español– podrían conjugarse las necesarias reformas que resolvieran de una vez por todas los problemas del país. Pero los límites reales de la voluntad política del proyecto socialista se situaron, precisamente, en los temas claves en lo que se decidía el futuro económico del país. En definitiva, la propuesta *de cambio* se limitó más a los aspectos socioculturales que a los políticos y económicos, y en donde el mensaje de cambio social confluyó con el mensaje regeneracionista, que la dirigencia socialista bien supo representar en aquellos momentos⁴⁸⁶.

La funcionalidad de este planteamiento residió, en buena parte, en un estricto cálculo electoral que, impregnado por un “fuerte pragmatismo político”, fundamentarían la oferta socialista como la “única alternativa válida” para la consolidación de la democracia. Por último, el “PSOE, partido de la modernización” se convirtió en el “partido de todo el mundo”⁴⁸⁷.

Los resultados electorales confirmarían todos los pronósticos: la opción socialista obtendría un amplio e histórico triunfo. El éxito del PSOE estribó, en buena medida, en presentarse, tal como lo ha definido la sociología electoral, en un partido *trendy*, es decir, «los electores querían el cambio, y el PSOE fue el único partido que se presentó de forma realista y fidedigna como agente del cambio y con posibilidades de ganar»⁴⁸⁸. Elecciones que, en todo caso, marcarían una reorientación del voto que se mantendría constante en las siguientes convocatorias electorales. Lo que no daba lugar a dudas es que el proyecto socialista se legitimaba tanto política como socialmente, así como se justificaban dentro del partido los *necesarios sacrificios* por los que se había tenido que atravesar.

Las condiciones *objetivas* y *subjetivas* favorecieron la opción electoral socialista. Además a su alrededor se aglutinaron numerosos factores que, a la postre, harían de esta convocatoria electoral una especie de plebiscito sobre el estado de salud del sistema democrático. Lejos de la imagen transmitida sobre la transición posfranquista con unas etapas definidas, claras y con una orientación prefijada, lo que se puede observar es un proceso político repleto de interrogantes y de pasos en diferentes direcciones, que ni mucho menos iban por el camino que finalmente arrojaron los *resultados finales* de este ciclo de cambios institucionales y económicos.

Muy lejos de la *heroicidad* con la que se ha querido revestir a este periodo histórico, lo que nos encontramos es, más bien, con la fragilidad e incertidumbre que rodearon la toma de decisiones claves. Todas las dudas sobre la posibilidad de continuar con el proceso de redemocratización de las instituciones se acentuaron durante el año 1982. Estas especiales circunstancias convertirían esta convocatoria en unas *elecciones críticas*, por emplear el término propuesto en su día por V.O. Key⁴⁸⁹.

⁴⁸⁶ Esta misma *moderación* del programa electoral del PSOE se convirtió en un motivo de preocupación para muchos socialistas, tal como señaló Julio R. ARAMBERRI: «[E]n el mismo se contempla escasos cambios o reformas de las que, antes, los enterados llamaban de estructuras. El cambio al que se aludía no era ni económico ni político. En ambos terrenos sólo se proponía una gestión más racional de la crisis y la consolidación de la democracia [...]. De suerte que, poco a poco, lo que emergía era un compromiso con el cambio moral, con un modo distinto de hacer las cosas, con la apelación al regeneracionismo, con un discurso sobre la disminución de las desigualdades sociales». ARAMBERRI, Julio R, “El encanto y..., *op.cit.*, p. 8.

⁴⁸⁷ ROMÁN, Paloma, *El Partido Socialista...*, *op.cit.*, p. 560. Señalaba al respecto la autora que el PSOE como el *partido de todo el mundo* se había convertido a su vez en «un partido globalizador de intereses sociales de todo tipo. Un gestor universal de la sociedad». *Ibíd.*, pp. 560-561.

⁴⁸⁸ PUHLE, Hans-Jürgen, “El PSOE: Un partido predominante y heterogéneo” en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio...*, *op.cit.*, p. 290.

⁴⁸⁹ KEY, V.O., “A theory of Critical Elections”, *Journal of Politics*, nº 17, (1955), pp. 3-18.

Tres condicionantes se aunaron para tal calificación: primero, junto con los extraordinarios factores que se combinaron en aquel preciso momento, la convocatoria electoral modificaría sustancialmente los *cleavages* del sistema político y electoral, así como marcaría una clara reorientación del voto en las sucesivas elecciones como se acaba de dejar apuntado. En segundo lugar, la cuestión no radicó en quien sería el vencedor de las mismas, sino lo realmente importante fue averiguar el margen de legitimidad política con que contaría el PSOE tras las elecciones⁴⁹⁰. Que los socialistas iban a representar por sí solos la nueva hegemonía política era un asunto sobre el que pocas dudas cabían. Ahora bien, si los gobiernos socialistas pudieron llevar adelante su ambicioso plan de reformas –hasta el punto de transformarse de *facto* en la “necesaria fuerza de transición del modelo decadente a las nuevas líneas de producción”⁴⁹¹– sin el riesgo de que se produjera un conflicto social generalizado o la apertura de una brecha en la sociedad de consecuencias no conocidas, se debió, en gran medida, a que las elecciones de octubre de 1982 adquirieron una “dimensión suprapartidista e institucional”⁴⁹². Un tercer factor no desdeñable sería la propia convocatoria electoral, lo que junto con el desarrollo de la campaña generaría un alto grado de identificación entre la sociedad española y la propuesta socialista. Campaña en donde predominaron las funciones expresivas por encima de las estrictamente políticas, como acertó en señalar en su día José Ignacio Wert:

«Entre las funciones de las campañas electorales cumplen, predominaron en está de 1982 sin duda las expresivas sobre las conativas. Es decir, la campaña funcionó mucho más como un mecanismo de suscitar identificaciones y entusiasmos que como un medio para recoger votos»⁴⁹³.

El contexto en el que se desarrollaron las elecciones del año ochenta y dos, en resumen, ayuda a explicar la nueva legitimidad que arroparía a los gobiernos socialistas una vez instalados en el poder. La última prueba y/o obstáculo para el acceso al poder se superaría con *nota*. Por estas mismas razones, el estudio de la campaña electoral aporta numerosas hipótesis para la posterior visualización y materialización de *El Cambio*. Como destacó el que fuera el director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Julián Santamaría, dichas elecciones se convirtieron “en un plebiscito para decidir si el PSOE era o no el partido que debía formar ese Gobierno”⁴⁹⁴.

En el final del verano de 1982 la precariedad institucional era la nota dominante⁴⁹⁵. El clima de pre-campaña electoral resultaba evidente. Dicho en otras palabras: la misma estaba ya

⁴⁹⁰ En una de las primeras encuestas preelectorales publicada en *Diario 16*, el 24 de septiembre de 1982, el PSOE obtenía un 51% de los votos seguido por Alianza Popular con un 13% [datos procedentes de la encuesta de intención de voto realizada por ALEF sobre un total de más de 1.500 encuestas]. El resto de las encuestas realizadas durante esas mismas fechas siempre reflejaron, con mayor o menor precisión, el arrollador triunfo socialista. Ejemplo de ello, primero, fue la publicada el último día hábil para hacerlo, el 22 de octubre, por parte de *El País* (*Cuadernillo especial*). Encargada a SOFEMASA y llevada a cabo sobre un total de 18.000 entrevistas personales sería la que más se acercaría a los resultados finales. La encuesta daba un 78,5% de participación y al PSOE se le otorgaba un 42,8% en intención de voto y a AP un 21,2%. La encuesta publicada también aquel día por *Diario 16*, y encargada nuevamente a la empresa ALEF en base a una muestra de campo de 7.000 personas entrevistadas, concedía al PSOE un 49,2% y a AP un 18, 2% en intención de voto.

⁴⁹¹ PETRAS, James, *La socialdemocracia...*, *op.cit.*.

⁴⁹² POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 329.

⁴⁹³ WERT, José I., “La campaña electoral...”, *op.cit.*, pp. 63-64.

⁴⁹⁴ SANTAMARÍA, Julián, “Elecciones generales...”, *op.cit.*, p. 14.

⁴⁹⁵ En el informe de gestión realizado por la CEF del PSOE de cara al XXIX Congreso se señalaba no sin cierto toque de ironía: «Hay más crisis de Gobierno que reuniones del Comité Federal, y no por que éstas sean escasas, son las más frecuentes de toda nuestra historia como Partido sino porque la fórmula gubernamental basada en el conglomerado ucedista y los apoyos coyunturales que recibe no

lanzada desde un largo tiempo. Si hasta el momento se había avanzado con dificultades, el proceso de desintegración del Gobierno centrista y de su propio grupo parlamentario, encendería todas las voces de alarma. Con el efecto de que aquella situación pondría en *guardia* a los sectores más inmovilistas ante el riesgo añadido de perder el control de la situación. Un dato lo confirma más allá de la sucesiva entrada y salida de ministros en los gobiernos. De 168 diputados que disponía UCD al inició de la legislatura para aquellas alturas tan sólo podía contar con la confianza y apoyo de 123. El *lento goteo* de pérdida de apoyos iba, en paralelo, a la aparición de nuevos partidos políticos en su seno como fue el caso de la creación del Partido de Acción Democrática de la mano del futuro ministro socialista Francisco Fernández Ordóñez⁴⁹⁶.

A la situación de crisis interna se sumarían muy pronto los pésimos resultados electorales obtenidos en las elecciones al parlamento de Galicia en 1981, en donde el partido del Gobierno ya se vería superado por AP⁴⁹⁷. Que el cataclismo final se avenía a toda prisa lo confirmarían también los votos cosechados en mayo de 1982 en las primeras elecciones al parlamento andaluz, en donde la UCD tan sólo recogería el 13% de los votos emitidos, viéndose superada por AP como segunda fuerza política⁴⁹⁸. Igualmente, los diversos sondeos pre-electorales publicados en aquellos meses previos vinieron a confirmar la posterior realidad. En una fecha tan temprana como en febrero de 1982 UCD obtenía un escaso 13% de potenciales votos. A principios de octubre esta estimación había descendido a un escaso 5%, según varios sondeos del CIS.

La siguiente tabla es muy significativa al respecto de la progresiva caída del apoyo electoral de la que hasta hace poco tiempo había sido la fuerza política mayoritaria.

Tabla 1. Evolución de la intención del voto (%) entre 1979-1981

	XII-79	II-80	VI-80	I-81	V-81	II-82	VI-82	X-82
(N)	1.147	1.190	1.201	1.204	1.199	1.200	1.200	1.200
UCD	27	22	15	13	15	13	10	5
PSOE	26	31	25	19	24	30	30	31
AP	4	4	5	5	5	8	9	12
PCE	7	8	3	4	4	4	4	3
Otros	8	13	9	5	7	7	5	4
No votaría	5	6	12	15	10	12	12	10
NS/NC	22	18	32	38	36	27	31	34

Fuente: Diversas encuestas del CIS y elaboración propia⁴⁹⁹.

sirven para afrontar los problemas de todo orden de la sociedad española». AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria. Informe de Gestión. 29º Congreso”, Madrid, 1981, sig. Fc 246, p. 11.

⁴⁹⁶ Nos remitimos sobre su trayectoria a, DELGADO, Santiago y SÁNCHEZ MILLAS, Pilar, *Francisco Fernández Ordóñez...*, *op.cit.*.

⁴⁹⁷ Véanse, GONZÁLEZ ENCINAR, José Juan, “El supuesto giro a la derecha en las elecciones al Parlamento gallego”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 25, (1982), pp. 53-79; y, LARAÑA, Enrique, “Interpretación de los resultados electorales y predicciones políticas. Las elecciones autonómicas de Andalucía y Galicia (1982 y 1985)”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 50, (1986), pp. 285-309.

⁴⁹⁸ Un completo estudio en, DARO CANCELA, Diego, *Las primeras elecciones autonómicas de Andalucía: 1982*, Cádiz, Grupo de Investigación «Historia Contemporánea», 1992. Y asimismo al balance global de, GARCÍA GARCÍA, Antonio Claret, *Economía y comportamiento electoral de los andaluces: 1982-2004*, Sevilla, Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2008.

⁴⁹⁹ Datos extraídos del estudio del CIS, “La evolución del voto: 1979-1982” realizado entre los meses de diciembre de 1979 y octubre de 1982, y publicado en *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 28, (1984), pp. 305-321.

Así mismo, los sucesos que antecedieron a las elecciones legislativas tampoco vaticinaban potenciales escenarios que pudieran revertir la precaria situación de partida. El mes electoral comenzaba con graves inundaciones en Cataluña, Levante y Castilla-La Mancha. El importante aumento de las acciones terroristas de la banda militar ETA en el País Vasco no sólo evidenciaba la fragilidad del momento, sino que favorecían políticamente a los sectores ultras provenientes del anterior régimen con mucho que decir y sobre todo con mucho poder acumulado⁵⁰⁰. Tampoco ayudaría a las opciones electorales de UCD el descubrimiento de un complot denominado como “Operación Cervantes”. Complot abortado que estaba encabezado por un grupo de militares franquistas quienes preparaban dar un Golpe de Estado el día anterior a las elecciones. Que el proceso democrático cojeaba seriamente y que las reminiscencias del pasado no se habían superado, lo terminó por confirmar la presentación a las elecciones de un partido de nueva creación denominado “Solidaridad española”. Su cabeza electoral, el golpista Tejero, finalmente pudo presentarse a las elecciones desde la propia cárcel.

Si el contexto político y socioeconómico era complicado de por sí, a esto vinieron a sumarse otra tanda de factores distorsionadores de notable relevancia, que, en cierta medida condicionaron si bien no los resultados electorales si el transcurso de la campaña. Al pesimismo político reinante y la creciente falta de confianza de la ciudadanía en el proceso de transición, cuyo final no se alcanzaba a vislumbrar; los poderes fácticos –o si se prefiere de las *clases dominantes*– que, hasta el momento habían manejado en buena medida los límites por los que había transcurrido el cambio político, hicieron acto de presencia pública. De esta forma rompían con una estrategia que basada en conspiraciones y presiones, había tratado de mantenerse en años anteriores alejada de los principales focos informativos y estrictamente públicos⁵⁰¹.

Aquí confluyeron varias cuestiones entrecruzadas. Primero, la inexistencia de una derecha civilizada y democrática, portadora además de una cultura política profundamente reaccionaria. Derecha, con nombres y apellidos, que veía en la llegada de los socialistas al ejecutivo la abierta posibilidad de que sus privilegios amasados durante decenios pudieran ser cuestionados. Ha sido ésta una cuestión sobre la que una y otra vez han insistido quienes se han acercado a tan peculiar trayectoria política⁵⁰². Como destacó el politólogo italiano Mario Caciagli: “El principal problema español se configura una vez más, en la formación de un

⁵⁰⁰ Remitimos aquí a, RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis, “Los terrorismos en la crisis del franquismo y en la transición política a la democracia”, *Historia del Presente*, nº 13, (2009), pp. 133-151. Véase lo apuntado en la *nota 181*.

⁵⁰¹ De nuevo los datos que aporta Mariano Guindal resultan, sencillamente, reveladores. Allí se aborda como desde el principio de la transición hasta el Ejecutivo presidido por Calvo-Sotelo, la CEOE, con el apoyo de la banca, de forma continua se iría suministrando cientos de millones de pesetas a UCD – generalmente en paquetes de 400 millones de pesetas e indicaba el autor además: «[a]lgunos cálculos indican que por la CEOE se canalizaron cerca de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) hacia UCD»-. No obstante, esta políticas de alianza terminaría rompiéndose, tras no pocos conflictos y choques y una cada vez mayor falta de confianza, tras los resultados de las elecciones de Andalucía y Galicia, en donde la CEOE participaría activamente financiando a la UCD y realizando costosas campañas de propaganda como la conocida como la *manzana* y el *gusano* en las elecciones andaluzas. Meses más tarde y ante la segura derrota de UCD, la CEOE apoyaría ya a AP. Véase, GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, pp. 131 y 173-ss. Al respecto, el testimonio, otra vez, de Alfonso Guerra es revelador: «Los empresarios tuvieron que ‘tragarse’ su asqueroso gusano, pero enseñaron sus escasas, o nulas, convicciones democráticas. Más tarde supe por José María Cuevas (el 25 de octubre de 1982) que cuando los empresarios de la CEA, los empresarios andaluces, idearon la campaña contra el PSOE-A lo consultaron con la dirección de UCD [...]. Lo hicieron el día 3 de mayo, y según Cuevas lo hablaron con Martín Villa, López Jiménez, Soledad Becerril e Iñigo Cavero, los que aceptaron la idea pero pidieron tiempo para consultarlo con el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Este contesto: ‘¡Adelante!’». GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, *op.cit.*, p. 416.

⁵⁰² Véase, GONZÁLEZ CASANOVA, José A., *La derecha contra...*, *op.cit.*. Y ya desde una visión a largo plazo, PIQUERAS, José Antonio, *Cánovas y la derecha española: del magnicidio a los neocon*, Barcelona, Península, 2008.

bloque electoral y social que sea conservador y democrático al mismo tiempo”⁵⁰³. Segundo, la sola posibilidad de verse apeados del poder político o que su sobresaliente influencia en las decisiones gubernamentales pudiera llegar a estar recortada, se transformarían en poderosas razones para iniciar una *campaña del miedo*, que si bien no influyó significativamente en la acumulación de fuerzas electorales por parte del socialismo, vinieron a desestabilizar todavía más la precaria situación política⁵⁰⁴. No obstante, esta política de tensión, en donde el miedo real y simbólico había sido una constante desde la propia muerte del dictador, tenía un antecedente cercano: la campaña de las elecciones generales de 1979, cuando Adolfo Suárez en un ejemplo digno de manipulación informativa en TVE española, había avisado de los potenciales problemas en caso de una posible victoria electoral socialista en coalición con los comunistas como ya se hizo constar.

Indudablemente todos estos factores pesaron, y mucho, en la estrategia de la conquista del poder político por parte del PSOE. Otra cuestión fueron sus consecuencias posteriores. El miedo a las posibles reacciones involucionistas estuvo presente en la mente de la dirigencia socialista desde muy pronto:

«Esas reacciones se van a producir del lado del gobierno, de la UCD y de la CEOE: pasos atrás en la política de concertación y negociación, puesto que se beneficia al PSOE; polarización política y distanciamiento de los interlocutores del lado de la derecha. Esas reacciones se van a producir como presiones desestabilizadoras diversas. Esas reacciones van a tener lugar antes y también después de las elecciones: para evitar la victoria del PSOE, para cortocircuitar su gobierno»⁵⁰⁵.

La clase dominante proveniente del franquismo –en donde las oligarquías financieras tenían un peso considerable⁵⁰⁶– había llegado a principios de los ochenta con su poder prácticamente inmaculado. *Bloque de poder* que vio en la llegada del PSOE al Ejecutivo, a las *nuevas hordas marxistas* que conducirían al país al caos y a la violencia. Nucleadas en torno a la CEOE y Alianza Popular, su principal objetivo sería formar una gran plataforma anti-socialista. Un *plan* que fracasó estrepitosamente. A este conglomerado de despropósitos, en breve, se sumaría la jerarquía de la Iglesia Católica, con la Conferencia Episcopal con la cruz

⁵⁰³ CACIAGLI, Mario, “España 1982..., *op.cit.*, p. 116.

⁵⁰⁴ Sobre esta cuestión véase, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «campaña del..., *op.cit.*”

⁵⁰⁵ AHFFLC, PSOE-CEF, “Sobre la situación política. Informe de la CEF del PSOE”, Madrid, noviembre de 1981, sig. 002280-007, p. 8.

⁵⁰⁶ Entre las numerosas lagunas de nuestra historiografía contemporánea con respecto a su pasado reciente destacan, o al menos han de resaltarse, las relacionadas con el surgimiento de la CEOE, CPYME y el Círculos de Empresarios, entre otras organizaciones empresariales, a principios de la transición. La literatura hasta ahora disponible o bien ha pecado de *militante* en su versión pro-empresarial, o bien, se ha caracterizado por no emplear documentación de archivo. Así pues, en primer lugar, léanse de nuevo las advertencias de, PRO RUIZ, Juan, “Sujetos con poder en la España contemporánea” en RIVERA, Antonio, ORTÍZ DE ORRUÑO, José M^a y UGARTE, Javier (eds.), *Movimientos sociales en..., op.cit.*. Y, por lo demás, y pesar de estos problemas de fondo véanse: PARDO, Rafael y MARTÍNEZ, Roberto, “El asociacionismo empresarial en la transición”, *Papeles de Economía Española*, n° 22, (1985), pp. 84-114; RIJNEN, Harry, “La CEOE como organización”, *Papeles de Economía Española*, n° 22, (1985), pp. 115-121; GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, Secundino J., *Aproximación histórica a las organizaciones empresariales en España*, II vols., Madrid, CEIM, 2001, vol. II, *Las organizaciones empresariales en la transición: 1975-1978 (Del Consejo Nacional de empresarios a la CEOE y CEIM)*; RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, *25 años del Círculo de Empresarios (1977-2002)*, Madrid, Círculo de Empresarios, 2002. Todo ello, junto a lo ya apuntado en la nota 258. Consúltense asimismo, primero, y en relación a la década de los años ochenta: GARCÍA LÓPEZ, José y ALVIRA MARTÍN, Francisco, “La crisis económica: actitudes de consumidores y empresarios”, *Papeles de Economía Española*, n° 2, (1980), pp. 99-133; PÉREZ DÍAZ, Víctor, “Los empresarios y la clase política”, *Papeles de Economía Española*, n° 22, (1985), pp. 2-37; por otro lado, junto con el libro de referencia de, CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de..., op.cit.*, consúltense la que a día de hoy constituye una de las aproximaciones más enriquecedoras: GUINDAL, Mariano, *El declive de..., op.cit.*

por delante, para denunciar abiertamente los peligros que acechaban si los socialistas alcanzaban el gobierno. Especialmente combativa se mostraría en aquellos aspectos que habían sido parte de su monopolio de poder durante siglos. A saber: la enseñanza privada, las directrices morales sobre las políticas de planificación familiar, así como temas relacionados con el divorcio o el aborto⁵⁰⁷.

No tardaron en llegar las reacciones y la campaña de desestabilización política. Y ahí, precisamente, encontraron a un medio de comunicación escrito que estuvo por la labor de emponzoñar la campaña electoral. Nos referimos al periódico *ABC*⁵⁰⁸. Evidentemente otros muchos medios colaboraron con entusiasmo en tal tarea. Sin embargo, ninguno de los restantes tenía la difusión y el “prestigio” del diario conservador-monárquico. Aunque sea de forma abreviada, resulta de interés detenerse, en términos históricos, en la *campaña del miedo* desarrollada por este medio de comunicación en colaboración con la principal organización empresarial del país. Su análisis puede ofrecer un relato del desarrollo de la campaña electoral más concreto y realista que si lo enfocamos a nivel clásico. A saber: una narración de los actos electorales, mítines, encuestas y ruedas de prensa de las diferentes fuerzas políticas con las consiguientes *anécdotas* y hechos superficiales.

⁵⁰⁷ Señaló en su día el politólogo Mario Caciagli con respecto al ‘incendiario’ documento publicado por la Conferencia Episcopal a finales de septiembre de aquel año lo siguiente: «Desde la muerte de Franco, la Iglesia no había hecho público nunca un documento tan decididamente político. Si por un lado tampoco había aceptado con tanta claridad la defensa de las instituciones democráticas y seguía haciendo algunas críticas a la Constitución, por el otro se entrometía en la campaña electoral apelando al ‘elector cristiano’». CACIAGLI, Mario, “España 1982...”, *op.cit.*, p. 96, *nota 10*. Debe recordarse también como tras prolongadas negociaciones del propio PSOE con la propia Conferencia Episcopal, se consiguió retrasar un viaje del Papa Juan Pablo II previsto en plena campaña electoral. El viaje finalmente aplazado se llevaría a cabo pocos días después de las elecciones. El problema de fondo no residía como señaló Felipe González en que la Iglesia Católica temiera perder con la previsible llegada de los socialistas dinero o gran parte de sus negocios, sino que «[t]emía perder poder ideológico y control». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 840. Véase también aquí: HERNÁNDEZ, Abel, *Crónica de la cruz y la rosa. Los socialistas y la Iglesia hoy*, Barcelona, Argos-Vergara, 1984; PIÑOL, Josep M., *La transición democrática de la Iglesia española*, Madrid, Trotta, 1999; CÁRCEL, Vicente, *La Iglesia y la transición española*, Valencia, EDICEP, 2003; MARTÍN de SANTA OLALLA SALUDES, Pablo, “Izquierda y aconfesionalidad. Las relaciones entre la Iglesia y el primer gobierno socialista” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, pp. 121-139; y concretamente, CARLI, Romina de, “La jerarquía episcopal y el proyecto democratizador de Adolfo Suárez (julio 1976-junio 1977)”, *Historia Actual Online*, n° 14, (2007), pp. 69-79. Véase aquí también, MONTERO GARCÍA, Feliciano (ed.), *El despegue de la Iglesia*. Dossier monográfico, *Historia del Presente*, n° 10, (2007).

⁵⁰⁸ En aquel tiempo histórico en donde se desarrollaría tan *peculiar* campaña, el director del *ABC* era Guillermo Luca de Tena. En el año 1977 llegaba a la dirección del periódico al poco tiempo de ser nombrado Senador Real. Su objetivo –según han contado sus hagiógrafos– desde el principio fue la ‘apertura liberal’ del periódico con la «misión de devolver la independencia periodística y editorial al periódico, y ofrecer a los lectores un análisis más objetivo de la realidad, especialmente de la realidad política», tal y como ha señalado, OLMOS, Víctor, *Historia del ABC...*, *op.cit.*, p. 551. El nuevo director se enfrentaría a dos grandes problemas. En primer lugar, se produciría una fuerte reacción por parte de los periodistas más conservadores del diario –especialmente entre los que mayor tiempo llevaban en el seno del diario junto con los altos cargos ejecutivos– ante el talante *liberal* que el nuevo director se había propuesto dar a la línea editorial de *ABC*. El segundo gran problema sería la profunda crisis financiera por la que atravesaba el periódico en un momento que no se descartaba una reestructuración global de su empresa editorial (*Prensa Española*). Para finales de 1982 *ABC* apenas superaba los 127.000 ejemplares al día según datos de la OJD [datos extraídos de, OLMOS, Víctor, *Historia del ABC...*, *op.cit.*, p. 551]. Sobre la evolución del periódico *ABC* y su vinculación con los centros de poder en la historia de España durante el siglo XX, véanse visiones parciales cuando no sectarias en, IGLESIAS, Francisco, *Historia de una...*, *op.cit.*; PÉREZ MATEOS, Juan Antonio, *ABC Serrano 61...*, *op.cit.*. Por lo demás consúltese, ÁLVAREZ GARCÍA-BERNANDO, Ángeles, *Análisis estructural de las elecciones de 1982 en la prensa nacional española*, II vols., Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1986.

Al día siguiente de la convocatoria electoral, las primeras voces sobre el *peligro socialista* comenzaron a oírse por parte de la misma CEOE, a través de unas declaraciones de Carlos Ferrer Salat y José M^a. Cuevas en el periódico *ABC*, en donde se criticaba duramente la decisión de convocar las elecciones⁵⁰⁹. Por su parte a *ABC* no le faltó tiempo para advertir sobre “el peligroso camino” que representaba el programa electoral del PSOE en un editorial que apuntaba maneras: “Dos grandes espacios en el horizonte electoral”. Tras aclarar que *ABC* es “independiente pero no neutral” se decía como a pesar de las,

«las encuestas, las predicciones arrolladoras y los oportunismos *ABC* no necesita repetir cuál es su opción. España debería contar, creemos con un partido socialista firme e inequívoco, fuertemente instalado en la oposición durante los próximos cuatro años»⁵¹⁰.

Anotando el mismo tiempo:

«Tampoco, hace falta explicar con que ánimo tranquilo aceptará *ABC* el resultado de las urnas, en la seguridad de que las convicciones profundas están por encima de las fluctuaciones políticas. En la seguridad también de que la democracia es cambio, alternativa de poder, oposición leal, tensión creadora y capacidad de riesgo»⁵¹¹.

En breve, a esta campaña se sumaría el dirigente derechista, Manuel Fraga, quien llamaría una y otra vez a conformar una gran coalición en busca de la *mayoría natural en torno a un amplio bloque de derechas*⁵¹². Pero el frente anti-marxista propuesto no llegaría a buen puerto. Las diferencias entre el centro-derecha y la derecha política dura y pura, hicieron inviable un hipotético pacto electoral o una posible coalición postelectoral entre UCD y AP. Por un lado, la UCD tenía muy presente los más que serios y continuados intentos de acabar con los gobiernos ucedistas que se habían venido sucediendo desde años, en este caso, desde la derecha extrema. Actividad de desgaste en donde el empresario catalán Carlos Ferrer Salat destacaría por su afanoso empeño. Asimismo, la organización empresarial CEOE se sentiría traicionada por los gobiernos de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo-Sotelo, a quien llegaría a acusarlos de llevar una política de izquierdas con los votos de derecha⁵¹³.

El choque de parte de la clase dominante y empresarial con la realidad postfranquista fue mayúsculo⁵¹⁴. A pesar de que no se cuestionaría en forma alguna el poder y el *status*

⁵⁰⁹ El título del editorial de aquel día fue: “Razones de la fulminante disolución de las Cortes”, *ABC*, 28 de agosto de 1982. Y se apuntaba, entre otras cuestiones, las siguientes: «Ciertamente se puede decir que nos encontrábamos en una situación límite que hacía punto menos que imposible la gobernabilidad serena y estable salvo por la vía intrincada del consenso entre las formaciones mayoritariamente minoritarias».

⁵¹⁰ Editorial, “Dos grandes espacios en el horizonte electoral”, *ABC*, 3 de octubre de 1982. Mientras tanto, otros periódicos como *El País* ese mismo día informaban como tras una intervención de Felipe González en TVE, en donde expondría las propuestas socialistas en materia de *banca* o de *bolsa*, y concretamente a raíz de sus «desmentidos categóricos a cualquier intento nacionalizador por parte del PSOE» se produciría lo que el periodista calificaba «una resurrección de la bolsa». Noticia, Carlos Humanes, “Felipe González provocó una resurrección de la Bolsa”, *El País*, 3 de octubre de 1982.

⁵¹¹ Editorial, “Dos grandes espacios en el horizonte electoral”, *ABC*, 3 de octubre de 1982.

⁵¹² Véase, FRAGA, Manuel, *El cañón giratorio. Conservaciones con Eduardo Chamarro*, Barcelona, Argos Vergara, 1982.

⁵¹³ El desencuentro CEOE-UCD había comenzado muy pronto. En concreto en las elecciones de 1979. Como han destacado Mercedes Cabrera y Fernando Rey: «La CEOE fue beligerante en política durante las primeras elecciones. Ante las generales de 1979, Ferrer Salat envió una carta a todos los empresarios llamándoles a aunar esfuerzos para exigir del Gobierno un programa económico que defendiera el ‘principio de libre empresa’, y después remitió al nuevo ejecutivo un memorando sobre la situación económica. La nueva victoria de UCD, fue sin duda, una triste sorpresa para la patronal». CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de..., op.cit.*, p. 346.

⁵¹⁴ Sobre los empresarios y el franquismo comienza a existir un amplio *corpus* bibliográfico entre los que se ha de destacar sin posibilidad de exhaustividad: TUÑÓN DE LARA, Manuel, *Historia y*

económico de la clase dominante franquista, los empresarios seguían acomodados en un impune paternalismo empresarial de Estado que tan buenos resultados les había dado. A lo que se sumaba otro elemento a tener presente: la mala imagen que la clase empresarial del país seguía teniendo entre la mayoría de la ciudadanía como destacaron Mercedes Cabrera y Fernando Rey: “Muchos empresarios portaban el estigma de su supuesta connivencia con el régimen anterior, las dudas sobre su honestidad y moralidad, y la fama de explotadores o de escasamente modernos y competitivos”⁵¹⁵.

A pesar de todos los contratiempos, la CEOE en estrecha comunión con AP no estaba dispuesta a ceder ni un ápice del “verdadero protagonismo político” del que había disfrutado. Aunque, en verdad, cada vez le era más difícil “influir en las decisiones de política económica”⁵¹⁶. No obstante, las posiciones políticas iban por un lado y las percepciones más realistas por otro. “Había inquietud por la llegada del PSOE al poder. La mayoría de los bancos limpiaron la casa por dentro, por si acaso. Yo no diría que sintieran miedo. Se sabía que los socialistas no iban a hacer una política revolucionaria. Lo que había era un cierto temor a los atropellos que pudieran cometer por su inexperiencia”, puntualizó en su día el abogado Matías Cortés⁵¹⁷.

Volvamos al meollo del asunto. La estrategia que desarrolló la CEOE durante el mes de octubre es muy significativa de lo que aquí queremos remarcar. Aunque finalmente no pidiera el voto para ningún partido, su misión como *agitadores políticos* consistió en realizar lo que los expertos en medios de comunicación denominan “ruido informativo”. Como portadores de un discurso político que esperaba tener resonancia y trascendencia, llegaron a pedir a los electores “coherencia y reflexión” ante las urnas como un partido político más.

No escatimaron en gastos. La CEOE, a través de sus múltiples plataformas propagandísticas, gastaría una considerable suma de dinero en hacer llegar su mensaje a través de diversos anuncios, en los que se advertía sobre las consecuencias funestas de la llegada de un nuevo gobierno socialista. Y cuando no fueron anuncios fueron ostentosas reuniones, presentaciones y demás actos públicos para exhibir su fuerza, su mensaje, su posición. Excelente ejemplo de esta campaña fueron las declaraciones que realizaron los empresarios el jueves 7 de octubre. Reunión empresarial con aires conspirativos en donde denunciarían que el programa económico del PSOE llevaría a la profundización de la crisis económica. Por su parte

realidad del poder: El poder y las élites en el primer tercio de la España del siglo XX, Madrid, Edicusa, 1967; MOYA, Carlos, *El poder económico en España*, Madrid, Túcar, 1975; GINER, Salvador y SEVILLA, Eduardo, “From despotism to parliamentarianism: class domination and political order in the Spanish State” en SCASE, Richard (ed.), *The State in Western Europe*, London, Croom Helm, 1980, pp. 197-229; MOLINERO, Carme y YSÀS, Pèrre, *Els industrials catalans durant en franquisme*, Vic, Eumo, 1991; COMÍN, Francisco y MARTÍN ACEÑA, Pablo (eds.), *La empresa en..., op.cit.*; SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y TASCÓN, Julio (eds.), *Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936-1957*, Barcelona, Crítica, 2003; SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, “Los empresarios y la política económica del franquismo en los años sesenta y setenta” en QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael (coord.), *Historia de la..., op.cit.*; SÁNCHEZ SOLER, Mariano, *Ricos por la guerra de España. El enriquecimiento de la oligarquía franquista desde 1936 hasta la transición*, Madrid, Raíces, 2007; y, GUERRERO, Diego, “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos..., op.cit.*. Asimismo consúltese, CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio, *Las políticas de..., op.cit.*

⁵¹⁵ CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de..., op.cit.*, p. 327.

⁵¹⁶ *Ibíd.*, p. 346.

⁵¹⁷ Opinión citada en, GARCÍA ABADILLO, Casimiro, *El balance..., op.cit.*, p. 18. Atrás habían quedado los tiempos de los *miedos* frente a los socialistas. A modo de ejemplo y anécdota, una vez más, Mariano Guindal trae un recuerdo de los inicios de la transición a la democracia: «por aquellos días, el presidente del Banco Popular Luis Valls reunió al consejo de administración y les comunicó que había construido una sede bancaria clandestina en la madrileña calle de Velázquez, con el fin de seguir operando en el caso de que los socialistas nacionalizaran la banca». GUINDAL, Mariano, *El declive de..., op.cit.*, p. 38.

ABC no tardaría en hacerse eco. Funcionaban, entonces, a la perfección los “vasos comunicantes”. Al día siguiente en un duro editorial titulado “El mensaje de los empresarios” se manifestaba:

«El programa económico socialista, además de no incluir ninguna propuesta para reducir el gasto público y corregir el desequilibrio presupuestario, se desarrolla en un conjunto de proyectos que, implícitamente, significan la expansión del gasto público y la profundización del déficit [...]. La alternativa económica por la que aboga la CEOE, en esencial similitud con la opción liberal-conservadora, no incurre en prácticas de enmascaramiento. Es todo lo moderada que pueda ser una economía de libre iniciativa que está tan lejos del llamado ‘capitalismo manchesteriano’ como lo puede estar la alternativa del PSOE del socialismo staliniano»⁵¹⁸.

Días atrás los mensajes catastrofistas se habían multiplicado. El lunes 4 de octubre en un editorial titulado “Tercermundismo electoral” se cuestionaba la *limpieza* de las elecciones, aunque tratando de aportar un mensaje de optimismo ante lo que se venía encima:

«Por ejemplo, que un diario cambiante salga con una encuesta de nula fiabilidad, de la que extrae como corolario el título a toda página de que ‘Felipe arrasa’; tan escandalosa manipulación es cosa que deja bien a las claras un incontinente deseo de manipular al lector y una escandalosa ignorancia de los límites mínimos de la ética profesional»⁵¹⁹.

Con todo, su principal motivo de preocupación aquel día era bien diferente: el descubrimiento del complot militar “Operación Cervantes”. Inquietaba más a la dirección del periódico la buena imagen de las Fuerzas Armadas que la propia preparación del golpe de Estado:

«Podiera no ser tampoco juego limpio, en tiempos de campaña electoral, utilizar noticias relacionadas con la esfera militar para fabricar un clima de gravísima amenaza contra la democracia [...]. Pero, si es de prever y de esperar, era menos previsible la explotación política del hecho, que introduce aires tóxicos en nuestro ambiente electoral [...]. Involucrar nuevamente, en un suceso concreto, la imagen de las Fuerzas Armadas, en el comienzo de la campaña electoral, es una grave ligereza. Todo tiene un extraño aroma de tercermundismo centroamericano»⁵²⁰.

El 9 de octubre, tras el editorial “El mensaje de los empresarios”, se publicaba otro con el título de “Giro brusco en el clima electoral”⁵²¹. Tras avisar de que el programa electoral del PSOE “empieza a alarmar al español medio”, la *campaña del miedo* se recrudecía ante una hipotética intervención estatal descontrolada: “La oferta socialista es a un tiempo la adulación externa a la derecha y el proyecto interno de controlar, burocratizar y estatizar el sistema económico”⁵²². No terminaba la cosa ahí. Pues en el segundo editorial del día –“Tres problemas del socialismo. La supuesta moderación del programa del PSOE”– se denunciaba ya abiertamente el “verdadero proyecto revolucionario” del PSOE. La base argumental: un repetido documento de trabajo de la CEOE que no escatimaba sesgadas críticas contra la opción electoral socialista. *Difuso, profuso y contradictorio* fueron algunos de los calificativos vertidos. Así la supuesta moderación del PSOE tan sólo era un vulgar disfraz con los que tratar de engañar a su potencial electorado:

«No hay tal moderación en el propio sentido que el cambio que se postula tanto para la economía como para la sociedad española no es un cambio ni una modificación graduales como

⁵¹⁸ Editorial, “El mensaje de los empresarios”, *ABC*, 8 de octubre de 1982.

⁵¹⁹ Editorial, “Tercermundismo electoral”, *ABC*, 4 de octubre de 1982.

⁵²⁰ Editorial, “Tercermundismo electoral”, *ABC*, 4 de octubre de 1982. Véase asimismo el Editorial, “Aventurerismo golpista”, *El País*, 4 de octubre de 1982.

⁵²¹ El mismo día 8 de octubre *Diario 16* publicaba su segundo gran sondeo electoral realizado por ALEF con una muestra de 3.000 entrevistas. Una encuesta que venía a reflejar las siguientes intenciones de voto: un 45,9% para el PSOE y un escaso 16,3% para AP.

⁵²² Editorial, “Giro brusco en el clima electoral”, *ABC*, 9 de octubre de 1982.

los abanderados históricamente por las socialdemocracias europeas. Se trata, realmente, de un proyecto de cambio cualitativo de modelo económico, de articulación social e incluso de modificación del marco institucional»⁵²³.

Y continuaba señalando:

«El reconocimiento de la habilidad con que los redactores del programa han difuminado lo medular de su proyecto revolucionario no impide advertir, si se analiza rigurosamente como la CEOE lo ha hecho, que las fragmentaciones programáticas de tales objetivos sólo prueban esa habilidad política o propagandística, pero no demuestra la pregonada moderación»⁵²⁴.

Mientras tanto, la campaña seguía su curso: las sucesivas encuestas que iban publicándose señalaban de forma unívoca el triunfo electoral socialista. ¿Qué margen de confianza iba a obtener el PSOE? Aquel era el gran interrogante y no otro. Por lo demás, y tras unos días de relativa tregua, el *ABC* retomaría su campaña con más fuerza. En la semana que se inicia el día 20 el periódico publica una serie de editoriales en los que aborda diferentes aspectos del programa socialista. Se inicia la ofensiva final. “Cambio socialista y alternativa real” es el primero de ellos. Tras todo un alarde de literatura revisionista sobre el pasado reciente del país, el editorialista de turno comienza cuestionando la posible capacidad de gestión y de gobierno de la opción socialista:

«Desde tal supuesto, la opción socialista, aparte de no comparecer desgastada por los fallos y errores de la transición ni tampoco por haber participado en el poder durante los cuarenta años precedentes se apuntaría, la capitalización moral de los ‘cien años de honradez’, que fue su ‘slogan’ de las elecciones anteriores»⁵²⁵.

Todo un descubrimiento para el *ABC* que no dejó tampoco pasar la oportunidad para denunciar abiertamente:

«La oferta socialista de cambio es una propuesta de continuidad para quienes estén satisfechos con lo que hay. El único cambio real es el capaz de aportar soluciones reales y verdaderas. La alternativa verdadera reside en quienes no han gobernado ni cogobernado»⁵²⁶.

Pero sería partir del viernes 22 de octubre –a poco menos de una semana para la celebración de las elecciones– cuando *ABC* redobla sus “ataques antisocialistas” con más virulencia. De este modo, a través de cinco editoriales hasta el cierre de campaña, el periódico conservador expondría “su criterio ante lo que el día 28 se decide en las urnas”. Todo ello

⁵²³ Editorial, “Tres problemas del socialismo. La supuesta moderación del programa del PSOE”, *ABC*, 9 de octubre de 1982.

⁵²⁴ Editorial, “Tres problemas del socialismo. La supuesta moderación del programa del PSOE”, *ABC*, 9 de octubre de 1982. Al día siguiente de esta noticia *ABC* publicaba un extenso y completo artículo sobre el problema de la liberalización de la economía española: “Liberalización financiera: un futuro incierto” firmado por Francisco Canals, en el que se realizaba un balance pesimista ante la más que previsible llegada del PSOE al poder. Asimismo esa misma semana estuvo cargada de noticias económicas protagonizadas, entre otros ‘grupos de presión’ por la Confederación Empresarial Independiente de Madrid quien solicitaba el voto útil para los ‘moderados’. En concreto el titular de aquella noticia fue: “El CEIM solicita el voto útil a los moderados y se manifiesta contra la abstención”, *ABC*, 13 de octubre de 1982. Se recogía en aquella noticia de forma literal el contenido del tríptico publicado por la CEIM que venía a decir lo siguiente bajo el titular: “Defiende tus libertades. Razones para votar bien”: «[N]o se trata de pronunciarse a favor de un partido o en contra de otro, sino de ofrecer nuestro voto a aquellas opciones capaces de ofrecernos una perspectiva tranquilizadora de futuro y crear un clima empresarial propicio para la inversión. A la vista de los programas publicados, CEIM piensa que ‘la izquierda no garantiza el futuro’». Al día siguiente se continuaba en la misma línea, eso sí, ya con más claridad en la presentación de objetivos: “CEIM se decanta por el programa electoral de Alianza Popular”, *ABC*, 14 de octubre de 1982. Tras el mensaje de la CEIM vendrían a sumarse a esta postura otras instituciones como el Círculo de Empresarios.

⁵²⁵ Editorial, “Cambio socialista y alternativa real”, *ABC*, 20 de octubre de 1982.

⁵²⁶ Editorial, “Cambio socialista y alternativa real”, *ABC*, 20 de octubre de 1982.

revestido con pretensiones pedagógicas. Pues según *ABC* de lo que trataba era de *aclarar* la situación de confusión del momento. Pues su misión no concluía ahí: hacer ver y comprender que “oferta electoral” resultaba más adecuada para el futuro inmediato del país, a partir de ese instante formaba también parte de sus tareas informativas. El mismo día en que se conocía la concesión del premio Nobel para Gabriel García Márquez y la sociedad se conmocionaba con el estallido de la presa de Tous, se señalaba de forma destacada:

«Ni las encuestas interesadas ni los despliegues de la propaganda recortan habitualmente el nivel crítico del elector medio europeo, que acostumbra a rechazar de antemano todo planteamiento que apunte a resultados con vencedores imbatibles. En un momento nacional confuso, *ABC* quiere mantenerse a una distancia insalvable de todo interés de partido: pero eso no es un pretexto para huir hacia la neutralidad. Por fidelidad a sus lectores, por fidelidad a sus convicciones *ABC* analizará la oferta electoral que cree más acorde con los dos grandes objetivos nacionales: el arraigo de las libertades y la superación de la crisis económica. *ABC* expone esta opción –que es la del centro-derecha reformista y liberal– frente a todo oportunismo seguro de su valor como alternativa ahora y a lo largo de los próximos cuatros años, firme en su convicción de que ese proyecto es el más útil para hacer frente a los actuales problemas de España»⁵²⁷.

Cinco grandes temas centrarán su atención: la estabilidad constitucional, las libertades democráticas, la modernización del país, la opción por uno de los dos modelos económicos en disputa, y finalmente la posición de España en el Occidente. En lo que respecta a “La estabilidad” se despacha el asunto con un editorial del día 22 de octubre, en el que el argumento básico era que para superar los hondos problemas del país debía seguirse sencillamente por la senda hasta ahora trazada. El riesgo de cambios estructurales, según *ABC*, sería desastroso a corto plazo: “Imaginemos una reforma fiscal; un nuevo cambio en la estructura empresarial; un nuevo cambio jurídico; un nuevo cambio en la administración”. Llegado el caso de giros radicales “no sólo pondremos en peligro el cambio político, sino el cambio ya realizado”⁵²⁸. Y ahí la derecha política hija directa del franquismo tenía mucho que decir:

«[D]el centro y la derecha liberal conservadora, plural y diversa, pero acorde en el fondo, donde hay un propósito de concluir la transición, de consolidar las instituciones y, en suma, de dar a España la estabilidad que precisa para afrontar los problemas reales y ponerse seriamente a trabajar. Esta oferta abre un horizonte a la libertad real y de esfuerzo nacional, frente a la libertad abstracta y a la incertidumbre»⁵²⁹.

Sábado 23 de octubre, “Las libertades” es el editorial del día que comienza con el siguiente interrogante: *¿cuál de los programas electorales garantizan un margen más dilatado de libertades reales?* Su respuesta no deja lugar a dudas: “A nuestro juicio, la oferta liberal, que con diversidad de forma y coincidencia de fondo representan el centro y la derecha”⁵³⁰. Y si todavía no estaba claro la llegada del PSOE tan sólo nos conduciría a la peor de las *pesadillas* imaginables:

«El intervencionismo estatal implica decisivas limitaciones a la autonomía de las personas y a la iniciativa de los cuerpos intermedios, porque transfiere a la burocracia decisiones de control más difícil que el realizado por el mercado y en el mercado»⁵³¹.

No se dejaba pasar la oportunidad. Tocaba denunciar algunos de los planes reales del socialismo y de sus consiguientes peligros:

⁵²⁷ Editorial, “Ante las elecciones”, *ABC*, 22 de octubre de 1982.

⁵²⁸ Editorial, “Ante las elecciones (1). La estabilidad”, *ABC*, 22 de octubre de 1982.

⁵²⁹ Editorial, “Ante las elecciones (1). La estabilidad”, *ABC*, 22 de octubre de 1982.

⁵³⁰ Editorial, “Ante las elecciones (2). Las libertades”, *ABC*, 23 de octubre de 1982.

⁵³¹ Editorial, “Ante las elecciones (2). Las libertades”, *ABC*, 23 de octubre de 1982.

«1. La libertad de opinar: cuando el partido hegemónico de la izquierda habla de libertad de expresión, pero aspira a mantener una cadena de periódicos oficiales, nos hallamos ante una amenaza a la libertad»⁵³².

Había sido la derecha la que fue capaz de romper con el franquismo se concluía en aquel editorial. Y precisamente aquellos que habían protagonizado la lucha y la resistencia contra la dictadura, eran quienes ahora ponían en peligro la herencia de los *reformistas*⁵³³. Igualmente, y por si el lector se había saltado algún capítulo de esta trama conspiratoria, se aclaraba:

«Si hubo épocas en que los programas de izquierda ofrecían más libertad que los de la derecha, hoy la tendencia al colectivismo y el espíritu a veces inquisidor de los programas socialistas han invertido el sentido de la historia»⁵³⁴.

En el siguiente editorial, “La modernización”, venía a cuestionar el punto neurálgico del programa socialista. De esta guisa, y tras identificar el franquismo como el periodo más relevante de la historia del país, se atacaba duramente la deriva que traería el proyecto modernizador socialista. Así en el editorial del domingo 24 de octubre se podía leer:

«El análisis del programa socialista nos lleva a la conclusión de que no hay en ese proyecto una oferta viable de avance hacia la modernidad y sí muchos riesgos de improvisación, de bloqueo del sistema productivo, de desconfianza social, y en definitiva, de estancamiento»⁵³⁵.

La semana final antes de las elecciones se inauguraba con “Dos proyectos económicos, dos sistemas frente a frente”. Socialismo o libre mercado era la aparente cuestión a dilucidar. Ni el propio Friedrich Hayeck lo habría expresado tan claro. Y aquello en un país en donde la dictadura no había dejado de identificar al comunismo con el peor de los enemigos del país, constituía un argumento de peso. Al menos para los redactores del *ABC*. De salir triunfante el proyecto socialista, los “riesgos” e “incertidumbres” no harían sino florecer. A través de un lenguaje profundamente sesgado y maniqueo se contraponían dos modelos de gobierno económico: AP, *buenos*, PSOE, *malos*. Es decir un programa que apuesta por el libre mercado y otro que tiende a favorecer la intervención y planificación económica del Estado, que, en definitiva, “acumula riesgos e incertidumbres”.

«Dos opciones, pues, totalmente distintas. Para la oferta liberal conservadora la solución al paro y la recuperación económica pasan por el protagonismo empresarial y el juego con los distintos agentes económicos en una acción conjunta de flexibilidad, participación, responsabilidad y esfuerzo. La otra, oferta socialista, pasa por el papel dominante del Estado y por un proyecto planificador que acumula riesgos e incertidumbres»⁵³⁶.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, el más que previsible triunfo del socialismo español nos llevaría a quedarnos apeados del *progreso*, de Occidente en otras palabras. “Seguir

⁵³² Editorial, “Ante las elecciones (2). Las libertades”, *ABC*, 23 de octubre de 1982.

⁵³³ Triste paradoja precisamente de un periódico caracterizado por su comportamiento *militante* durante la dictadura franquista y también durante buena parte de la transición posfranquista. No faltan los ejemplos. Veamos dos sin ir más lejos de 1979. En primer lugar, se puede señalar la publicación a toda portada el 21 de noviembre de 1979 con una foto panorámica de la Plaza de Oriente abarrotada por falangistas y repleta de banderas anticonstitucionales con el siguiente titular: Portada, “Llamada a la unidad de España y de los españoles”, *ABC*, 21 de noviembre de 1979. En segundo término, véase la extensa entrevista concedida al Capitán General de la III Región Militar con sede en Valencia, Jaime Milans del Bosch, publicada el 23 de septiembre de 1979, en la que denunciaba de manera contundente el proceso de la Transición, y finalmente se afirmaba que el ejército estaba dispuesto a actuar cuando fuera necesario para garantizar «la soberanía e independencia de nuestra patria».

⁵³⁴ Editorial, “Ante las elecciones (2). Las libertades”, *ABC*, 23 de octubre de 1982.

⁵³⁵ Editorial, “Ante las elecciones (3). La modernización”, *ABC*, 24 de octubre de 1982.

⁵³⁶ Editorial, “Ante las elecciones (4). Dos proyectos económicos, dos sistemas frente a frente”, *ABC*, 25 de octubre de 1982.

en Occidente” era el título del editorial de *ABC* del 26 de octubre. Tras las consignas patrióticas de turno –“España, por su acción y por su pensamiento, es uno de los máximos protagonistas de la secular operación creadora de esa realidad histórica que es el Occidente”⁵³⁷– la pregunta a resolver era qué significaba ser occidental. El riesgo, ahora sí, era mayúsculo. España corría el mayor de los peligros ante una posible salida de la OTAN. La neutralidad anunciada por el PSOE conducía,

«a incardinarnos en el Tercer Mundo, por la vía de la involución económica o por querernos hacer subsidiarios políticamente al imperialismo más estricto de cuantos ha conocido nuestro tiempo. ¿Reemplazaría una España tercermundista, sustitutivamente, la amistad norteamericana por la indostánica, la francesa por la argelina, la alemana por la yemenita y la japonesa por la cubana?»⁵³⁸.

El *desastre* se acercaba a toda prisa. En paralelo a esta campaña de *ABC*, cuando más cerca estaba el día de las elecciones con más intensidad fueron apareciendo numerosos anuncios financiados por la CEOE y la CEIM a toda página en el propio *ABC*. Anuncios que no sólo desprendía un aroma “rancio” sino que dejaban atrás incluso aquellos no lejanos tiempos de la *reconciliación nacional*. En concreto, el martes día 26 de octubre se publicaba un anuncio a toda página firmado por la CEOE que tras un titular a cuatro columnas se podía leer “REFLEXIONA”, para a continuación dar paso al manido choque entre dos modelos económicos:

«Uno, que supone mayor crecimiento del coste de la vida. Mayores impuestos. Más actos improductivos del Estado. Más déficit de sus presupuestos. Más controles sobre los ciudadanos y las empresas. Más intercesión del Estado y más burocracia. Agrava intensamente los efectos negativos de experiencias ya vividas, aunque le llamen del ‘cambio’ [...]. Otro modelo, defiende con eficacia y sin controles innecesarios y perjudiciales, la auténtica libertad de los ciudadanos. Otorga su confianza al empresario. Controlará el crecimiento de los impuestos y del gasto improductivo del Estado. Fomentará el ahorro y el trabajo de los españoles. Todo ello contribuirá a generar más inversiones, más crecimiento y más empleo».

Realizado el anuncio venía la consigna:

«[E]s necesario VOTAR de manera consciente, reflexiva y útil»⁵³⁹.

Un día después a través del editorial “En la jornada de reflexión” se iniciaba el cierre de la campaña de *ABC*. “[E]n la jornada de reflexión no cabe defender una opción de partido” se decía al comienzo. Aunque sí consideraba lícito “defender la necesidad de votar”. Adelantándose al fatal desenlace, una gota de fútil optimismo se desprendía de cara a un improbable vuelvo electoral. De esta forma se apelaba al “instinto profundo y el largo olfato del español de a pie, tan superior a muchos profesionales de la política”. Y si esto de por sí no fuera suficiente:

«Les pedimos –si llega– que olviden la lluvia o el mal tiempo, la longitud de la fila ciudadana o el aburrimiento de la espera. Le proponemos que por una vez lean el *ABC* de pie, periódico también apasionante cuando el lector adopta esta posición que, como bien sabe, le llevó a distinguirse de los seres irracionales que jamás votan»⁵⁴⁰.

⁵³⁷ Editorial, “Ante las elecciones (y 5). Seguir en Occidente”, *ABC*, 26 de octubre de 1982.

⁵³⁸ Editorial, “Ante las elecciones (y 5). Seguir en Occidente”, *ABC*, 26 de octubre de 1982.

⁵³⁹ Anuncio publicado el martes 26 de octubre en el periódico *ABC* en la página 37 y firmado por la CEOE. No estuvo sola la organización empresarial ese día. Cuatro páginas después en la 41, otro anuncio a toda página firmado por la CEIM bajo el rotulo ‘La solución es votar’, señalaba lo que precisamente la campaña electoral había hecho olvidar. A saber: la permanente sensación de fatalismo y de desconfianza en el seno de la sociedad: «Contra el desaliento, contra la decepción, contra la confusión, contra la desgana, contra la incertidumbre, contra el fatalismo, contra el desencanto, contra la desesperanza, contra la desconfianza, contra el cansancio, contra la ambigüedad, contra el pesimismo. TU VOTO, PEOR ES ABSTENERSE».

⁵⁴⁰ Editorial, “En la jornada de reflexión”, *ABC*, 27 de octubre de 1982.

Que el nerviosismo ya era patente lo vino a confirmar, por si faltaban pruebas y argumentos, el editorial del propio jueves 28 de octubre: “Ante las elecciones de hoy. El voto inteligente”. Resumen y aclaración de las *consignas* a seguir con las correspondientes citas de autoridad:

«El modelo económico socialista es, como demostró Hayeck, un ‘camino de servidumbre’, que convierte a la mayoría de los ciudadanos en empleados desarmados frente a un Estado todopoderoso. Por el contrario, la oferta de centro derecha propugna la libertad económica de los agentes de la producción, defendiendo el derecho al trabajo de los asalariados y el derecho de los empleados a la libre iniciativa empresarial»⁵⁴¹.

Asimismo a través de un segundo editorial, “Fracaso de la reflexión”, *ABC* no dudaba en erigirse en portavoz de la ética periodística y de las libertades democráticas: “El fracaso de la «jornada de reflexión» por parte de los periódicos que se han comprometido, por coherencia ideológica o por simple interés, en la defensa del socialismo” había conducido a la “propaganda de la peor especie [que] es la antidemocrática y nada liberal descalificación política del adversario más cualificado que el socialismo tiene hoy”⁵⁴².

Tras la tormenta llegó la calma el 29 de octubre de 1982⁵⁴³. Todo ello con una lección aprendida. La confluencia de intereses entre las clases dominantes y la derecha política de AP, se transformaría en un gran fracaso: no sólo no debilitó las opciones electorales socialistas sino que sus ataques a la limpieza del proceso electoral no tuvieron mayor repercusión. En suma, y como destacó José I. Wert, “antes, durante y después de la campaña, que en su curso, no se modificaron sustancialmente los alineamientos políticos que se dibujaban antes de la convocatoria”⁵⁴⁴. Si acaso tuvo algún mérito la *campaña del miedo* fue la de aglutinar el voto conservador en el candidatura de AP, y esto era una cuestión que las encuestas ya habían detectado mucho antes y en la que *ABC*, junto con demás *compañeros de viaje*, a buen seguro, poco o nada influyeron.

⁵⁴¹ Editorial, “Ante las elecciones de hoy: El voto inteligente”, *ABC*, 28 de octubre de 1982.

⁵⁴² Editorial, “Fracaso de la reflexión”, *ABC*, 28 de octubre de 1982.

⁵⁴³ Por último, caben destacar una serie de editoriales de *ABC* tras las elecciones. El mismo 29 de octubre *ABC* en un escueto editorial titulado “Normalidad democrática” señalaba, precisamente, la *normalidad* con que había transcurrido el día de las elecciones, y el importante paso histórico que suponía el citado proceso electoral para la consolidación de la democracia. Remarcando, cómo no, el papel de la Corona en todo el proceso con ciertos aires místicos: «A nuestro juicio, el clima de inestabilidad –incluso amenaza a las más elevadas instituciones– que desde algunos sectores se había ido creando en las últimas semanas, se deshizo mágicamente, al conjuro de la presencia de Don Juan Carlos, en una audiencia que le colocó a él, al Rey, en su sitial máximo arbitro y moderador, y a los dirigentes de partido en un puesto de apoyo sin condiciones a la Monarquía». Editorial, “Normalidad democrática”, *ABC*, 29 de octubre de 1982. Ya el sábado 30 de octubre se publicaba: “Ante la victoria socialista”, una vez confirmada la mayoría absoluta del PSOE: «[E]n una horas de sorpresa y desconcierto para muchos españoles, de triunfo y esperanza para otros, siente la urgencia de expresar muy claramente tres cosas», que venían a concretarse de la siguiente manera: felicitar al partido triunfador, un mantenimiento de su posición política y una dura crítica al programa socialista. Insistiendo, por lo demás, en el espectacular avance de AP y del importante papel que deberá jugar la monarquía en adelante. Ahora bien, las dudas sobre la viabilidad de un gobierno socialista se mantenían aunque eso sí guardando las formas: «Al frente del Ejecutivo, en un momento de extrema dificultad, nos encontramos un hombre joven que ha sabido imponer disciplina y orden a su partido. El cambio producido es histórico, pero al mismo tiempo normal. Es esa normalidad, frente a toda ligereza de interpretación apocalíptica, la que debe ser reconocida hoy, la que reconocemos con nuestros lectores». Editorial, “Ante la victoria socialista”, *ABC*, 30 de octubre de 1982.

⁵⁴⁴ WERT, José I., “La campaña electoral..., *op.cit.*, p. Y añadía: «pero sí se genero un clima –en parte inesperado– de entusiasmo, esperanza, angustia y compromiso. Nunca, ni en los momentos inaugurales del nuevo régimen, se había vivido con tanta intensidad la política». *Ibídem*.

En torno a cuatro millones setecientos mil votos nuevos fueron a parar a la candidatura encabezada por Felipe González. 10.127.392 ciudadanos apoyaron la opción socialista. 202 escaños en el Congreso de los Diputados –un total del 48% de los votos con un 58% de los escaños– y 134 senadores arrojaron las papeletas. El PSOE ganaría con mayoría relativa o absoluta en 15 de las 17 Comunidades Autónomas quedando en segundo lugar en las restantes⁵⁴⁵.

Alianza Popular sería el otro gran triunfador. 5.409.229 votos –un 25% del total de los votos– le permitieron quintuplicar los resultados obtenidos en 1979, pasando de 9 a 105 diputados y obteniendo 54 senadores⁵⁴⁶.

Luego vendría la debacle electoral del resto de fuerzas políticas que habían protagonizado la transición a la democracia, iniciándose una serie de crisis internas en sus respectivas organizaciones de consecuencias considerables. La candidatura de la UCD perdería 4.866.854 votos, y tan sólo sería capaz de “retener” 1.425.248 votos. De 169 diputados pasaría a 11 y tan sólo obtendría 4 senadores de los 120 anteriores⁵⁴⁷. De hecho, el ex-presidente Calvo-Sotelo no obtendría ni siquiera el acta de diputado a pesar de ir como número dos por la candidatura de Madrid⁵⁴⁸. En lo que respecta al PCE, el previsible cataclismo de los comunistas se confirmó: 846.440 votos. Con más de un millón de votos perdidos por el camino y un escaso 4% tan sólo contarían en la siguiente legislatura con 4 diputados⁵⁴⁹. Por último, el recién creado

⁵⁴⁵ Sobre los resultados electorales y la campaña socialista véanse: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA [NAVARRO BOTELLA, Francisco José], *Las elecciones generales...*, *op.cit.*; TORCAL, Mariano y MONTERO, José Ramón, “Party change and cleavage formation: The effects of value on the Spanish Party Socialist System”, *Working Papers Institut de Ciències Polítiques i Socials*, nº 132, (1997). Ahora bien, el trabajo más completo sobre el asunto es el de: MUÑOZ ALONSO, Alejandro [et al.], *Las elecciones del...*, *op.cit.*. Un libro en donde se ofrece un repaso global y detenido por el desarrollo de las elecciones, junto con un balance pormenorizado de las encuestas pre-electorales y los posteriores resultados electorales. A sumarse también una amplia selección de los principales contenidos de los programas de otras fuerzas políticas que se presentaron a la citada convocatoria.

⁵⁴⁶ Véase aquí el clarificador estudio de, MONTERO, José Ramón, “Los fracasos políticos y electorales de la derecha española: Alianza Popular, 1976-1986”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 39, (1987), pp. 7-43.

⁵⁴⁷ Primero véase, GÜNTHER, Richard, “El hundimiento de UCD” en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio...*, *op.cit.*, pp. 433-492. La historia de su formación así como de su rápida desintegración, también es la historia de buena parte de la transición en sus primeros años de andadura. Constituida sobre unas siempre frágiles bases, no obstante, cumpliría un destacadísimo papel. Junto al ya citado libro de, HUNEEUS, Carlos, *La Unión de...*, *op.cit.*, y los apuntes bibliográficos de la nota 174, consúltense sobre este preciso momento al que nos estamos refiriendo: JÁUREGUI, Fernando y SORIANO, Manuel, *La otra historia de la U.C.D.*, Madrid, Emiliano Escolar, 1980; CHAMORRO, Eduardo, *Viaje al centro de UCD*, Barcelona, Planeta, 1982; y, ATTARD, Emilio, *Vida y muerte de UCD*, Barcelona, Planeta, 1983.

⁵⁴⁸ El candidato a presidente del gobierno por parte de UCD sería Landelino Lavilla. Véase aquí, LAVILLA, Landelino, *Sobre el régimen parlamentario: a los 30 años de vigencia de la Constitución (discurso de apertura leído el 27 de octubre de 2008)*, Madrid, Dykinson, 2008.

⁵⁴⁹ Sobre la debacle comunista, las memorias de sus dirigentes son muy significativas de la parálisis colectiva en la que quedaría instalada la organización durante los siguientes meses: LÓPEZ RAIMUNDO, Gregorio, *Para la historia del PSUC: la salida a la superficie y la conquista de la democracia*, Barcelona, Península, 2006; SÁNCHEZ MONTERO, Simón, *Camino de Libertad. Memorias*, Madrid, Temas de Hoy, 1997; o la del propio, CARRILLO, Santiago, *Memorias*, Barcelona, Planeta, 2008 [1993]. Y asimismo: CLAUDÍN, Fernando, *Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general*, Barcelona, Planeta, 1983; LISTER, Enrique, *Así destruyó Carrillo el PCE*, Barcelona, Planeta, 1983. Y consúltense una vez más, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Jaime Sartorius: en primera línea en la reconstrucción de la «lógica democrática»” en GÓMEZ ALÉN, José y VEGA, Rubén (coords.), *Materiales para el...*, *op.cit.*.

CDS no saldría mal parado teniendo presente las circunstancias de su formación. Aunque se demostró que el empuje electoral de Adolfo Suárez tocaba a su fin, los 604.293 votos cosechados y los dos diputados alcanzados, al menos, les permitió sortear el *ciclón socialista* sin verse apeados de las Cortes Generales⁵⁵⁰.

Las grandes variaciones del mapa electoral no terminaron ahí. Un 46% de los votantes de 1979 cambiaron de opción electoral. Asimismo las urnas contaron con tres millones de votos nuevos. El 79,8% de participación del censo electoral superó en mucho el 70% de las anteriores elecciones y marcaba un hito que tardaría en repetirse⁵⁵¹. Nació de esta forma un contexto de lucha electoral caracterizado, en adelante, por lo que se ha conocido como el *bipartidismo imperfecto*⁵⁵². Si en las segundas elecciones a Cortes UCD y el PSOE habían sumado entre ambas el 65,5% en las siguientes PSOE y AP alcanzarían el 74,3%. Así entre los diputados del PSOE y AP sumaban el 89% del total de los escaños. Dinámica que con algunas fluctuaciones, no ostensibles en todo caso, se consolidaría en las siguientes elecciones⁵⁵³.

Presentados de forma gruesa los resultados de las elecciones generales de 1982, de los mismos se desprenden una serie de claves analíticas que no sólo explican la importancia histórica de esta convocatoria electoral, sino sobre todo la legitimidad electoral –cuestión que no debe ni puede confundirse con el apoyo social– con la que contaría el proyecto de Gobierno del PSOE⁵⁵⁴. Esta misma legitimidad electoral conferida a la opción socialista, se convertiría en el mejor aval para llevar a cabo unas medidas *no deseadas pero necesarias*. De igual forma, la

⁵⁵⁰ Se toma aquí la expresión formulada por, LOMANA, Gloria, *El ciclón socialista...*, *op.cit.*. Por lo demás, sobre la trayectoria del CDS asociada al propio Adolfo Suárez consúltese el estudio con ciertas dosis hagiográficas de, QUEVEDO, Francisco, *Pasión por la...*, *op.cit.*

⁵⁵¹ Para la evolución de la abstención electoral véase el completo estudio del ya fallecido, JUSTEL, Manuel, *La abstención electoral en España, 1977-1993*, Madrid, Siglo XXI / Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995. La tasa media de la abstención electoral entre las elecciones de 1977 y 1993 ha estado en un 26%, pero ha variado ostensiblemente si las elecciones se consideraron *críticas* o *de cambio*, según ha señalado el mismo autor. Lo anterior ha revelado una peculiaridad del sistema político español, en donde la excepcionalidad del periodo vivido y la *escasa cristalización* del sistema de partidos, ha dado lugar «a la incertidumbre respecto a la estabilización de la abstención en torno a una cifra que pudiera considerarse ‘normal’». *Ibídem*, pp. 26 y 84, respectivamente. Asimismo sobre esta cuestión: ASTORKIA, José M^a, “Evolución de la abstención electoral en España, 1976-1991” en CASTILLO, Pilar del (ed.), *Comportamiento político y...*, *op.cit.*, pp. 3-18; BOIX, Carles y RIBA, Clara, “Las bases sociales y políticas en las elecciones generales españolas: recursos individuales, movilización estratégica e instituciones electorales”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 90, (2000), pp. 95-128; FONT, José, “La abstención electoral en España: certezas e interrogantes”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 71-72, (1995), pp. 11-40. Y asimismo, MCDONOUGH, Peter, BARNES, Samuel y LÓPEZ PINA, Antonio, *The cultural dynamics...*, *op.cit.*

⁵⁵² Giovanni Sartori lo ha definido como «un sistema multipartidista de tendencia bipolar». Para su teorización, SARTORI, Giovanni, *Parties and party systems: a framework for analysis*, Cambridge, University Press Cambridge, 1976. Para el caso español, BAR, Antonio, “¿Normalidad o excepcionalidad?: Para una tipología del sistema de partidos español, 1977-1982”, *Sistema*, n° 65, (1985), pp. 3-38.

⁵⁵³ Otro dato realmente espectacular de aquellas elecciones fue el *índice de inestabilidad* que alcanzó un valor de 42,9 puntos. Un ‘valor’ realmente alto si se compara con los 8,5 puntos de 1979 con respecto a las elecciones de 1977. De la misma forma es relevante destacar como el 46% de los votantes cambiaron de orientación en aquella consulta. Datos extraídos de: CACIAGLI, Mario, “España 1982...”, *op.cit.*, pp. 100-101. Autor, por cierto, quien empleó el término ‘cataclismo’ para definir las elecciones de octubre de 1982. Consúltese asimismo, id., Mario, *Elecciones y partidos en la transición española*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1986.

⁵⁵⁴ Dos estudios extraordinariamente relevantes para esta cuestión en, CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS, *Diez años de gobierno socialista*, Estudio n° 2024, 1992 [www.cis.es]; SÁNCHEZ-CUENCA RODRÍGUEZ, Ignacio y BARREIRO, Belén, *Los efectos de...*, *op.cit.*

convocatoria electoral sirvió de prueba de fuego para el sistema democrático. La posibilidad de alternancia en el poder quedaba constada, aunque circunscrita a las características y dimensiones que hemos venido explicando. Una nota positiva, en este sentido, fue la siempre resaltada y mencionada *normalidad* con la que se llevó a cabo el traspaso de poderes, lo que a juicio de Julián Santamaría supuso:

«[U]na triple inyección de legitimidad, autonomía y eficiencia ensanchando las posibilidades de consolidación del nuevo régimen. Pero además, desmintieron de manera rotunda la hipótesis de que las dos consultas anteriores habían estructurado ya en sus líneas fundamentales el formato y la dinámica del sistema de partidos sobre cuya caracterización específica no existía, sin embargo, acuerdo unánime»⁵⁵⁵.

Si bien el riesgo de una involución democrática no estaba descartado, el punto de inflexión en que se transformaron los propios resultados del 28 de octubre de 1982, disipó no pocas dudas sobre su viabilidad. En los siguientes cuatro años la consolidación del sistema democrático pasaría de ser un deseo mayoritario a una realidad política constatada.

Por lo demás, a diferencia de otras campañas electorales –por ejemplo, las convocatorias a Cortes de 1993 o 2004, campañas que en su desarrollo modificaron las iniciales intenciones de voto⁵⁵⁶– la de 1982, ante todo, ayudó a consolidar y a fijar una estructura de voto que las encuestas habían previsto con cierta exactitud meses atrás.

Tiempo más adelante se publicarían algunos estudios postelectorales de relevancia. A partir de los cuales puede profundizarse en el significado histórico de dicha convocatoria. Veamos alguno. Primero, el amplio estudio postelectoral del CIS realizado a los pocos meses de la celebración de las elecciones. El mismo aportó un buen número de indicadores sobre las razones que habían conducido finalmente a la ciudadanía a declinar su voto por el PSOE. Estudio asimismo en donde se dejaba bien claro como las inercias iniciales mayoritarias en aquella ocasión terminaron por materializarle el veintiocho de octubre: 31% mal gobierno de UCD; 24% campaña y programa del PSOE; 14% ser el PSOE el mejor partido; 10% el líder del PSOE; y 21% Nc/Ns⁵⁵⁷. Otro estudio, en este caso de la empresa DATA S.A., llevado a cabo entre noviembre de 1982 y enero de 1983 con 5.463 personas entrevistadas, confirmó lo anterior: 76% porque el cambio es necesario; 34% por la figura de Felipe González; y un 21% por el papel de la oposición, entre otros datos, que no dejaban de apuntar siempre en la misma dirección⁵⁵⁸.

La ya registrada expansión del “sentimiento del cambio” entre amplios sectores sociales, se constituyó en una realidad y en un factor electoral clave. La heterogénea procedencia del voto electoral así lo certifica. De entrada, observemos los factores externos e internos que se entrecruzaron. En cuanto a los primeros, de nuevo, debe descartarse que la “campaña del miedo”, de desestabilización de la situación política en otras palabras, influyera en los resultados finales. La sociedad española no sólo había madurado notablemente, sino que un amplio sector de la misma iba a optar por las *listas socialistas* como la mejor forma de

⁵⁵⁵ SANTAMARÍA, Julián, “Elecciones generales de..., *op.cit.*, p. 11.

⁵⁵⁶ Entre las decenas de estudios publicados véanse los *working papers* procedentes del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales Juan March: CRAIG, Patricia, “Political mediation, traditional parties and new social movements: Lessons from the Spanish Socialist Worker's Party”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 65, (1995); CRIADO OLMOS, Henar, “Strategic mobilization under uncertainty: The logic of PSOE mobilization strategies in the 1996 Spanish electoral campaign”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 181, (2002). Por lo demás, véase lo apuntado en el Capítulo 2, *nota 312*.

⁵⁵⁷ Datos extraídos de, LOPEZ PINTOR, Rafael y JUSTEL, Manuel, “Iniciando el análisis..., *op.cit.*, pp. 155-168.

⁵⁵⁸ Datos extraídos de, PUHLE, Hans-Jürgen, “El PSOE: Un partido predominante y heterogéneo” en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio...*, *op.cit.*, pp. 316-317.

gobierno, así como de cara a consolidar el trayecto democrático, más allá de otras consideraciones políticas, ideológicas, morales...⁵⁵⁹. La segunda razón de cierto peso fue que el *frente antisocialista* no iría más allá de vagas y exaltadas declaraciones de los dirigentes derechistas. El aglutinamiento del voto de la derecha sociológica no superó el 30%. Existe también un tercer factor líneas atrás apuntado: la campaña del PSOE, que confeccionada a través de unos mensajes claros y contundentes, supo captar como ninguna otra los *deseos de cambio* de la sociedad española.

A nivel interno, la opción socialista llegó a las elecciones sin fisura organizativa alguna. Apareció unida y disciplinada. Factores que, en suma, le confirió a la citada candidatura una imagen de seguridad y firmeza, lo que a su vez permitió al PSOE captar nuevos votos no sólo por el flanco de la izquierda política sino también por la derecha menos áspera⁵⁶⁰. Y lo que no es menos importante, atrajo a sus filas a un considerable electorado normalmente abstencionista o indeciso.

Mientras que partidos como la UCD o el PCE se enfrascaban en luchas internas lo que dañaba seriamente su imagen electoral exterior, tanto la dirección socialista como sus afiliados cerraron filas en torno al partido, un programa concreto y un liderazgo. Por su parte la maquinaria electoral funcionó a la perfección: casi 10.000 actos electorales se celebraron en donde Felipe González, quien ya actuaba, en cierta forma, como Presidente del Gobierno, participaría en 50 de los mismos. La campaña sería modélica y estaría cuidada hasta el último detalle –si exceptuamos la propuesta de los 800.000 empleos ya apuntados–. Campaña en donde

⁵⁵⁹ A finales de 1984 sólo uno de cada diez españoles prefería cualquier otro régimen a la democracia según el, CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS, *Imagen del sistema de partidos*, Estudio nº 1430, noviembre de 1984 [www.cis.es]. En torno a la evolución de los valores democráticos en la sociedad española, el CIS ha venido publicando un amplio conjunto de interesantes estudios de campo desde mediados de los años noventa. Informes en donde sobresale el amplio apego ciudadano sobre la forma en que se llevó y se desarrolló la transición a la democracia. Entre otros: CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS, *Transición y democracia*, Estudio nº 2201, 1995; id., *Recuerdo de la transición española*, Estudio nº 2252, 2001; id. *25 años después*. Estudio nº 2401, 2000; y, id. *Barómetro de octubre 2005*, Estudio nº 2622, 2005 [www.cis.es]. Consúltese asimismo; MORAL, Félix, *Veinticinco años después. La memoria del franquismo y de la transición a la democracia en los españoles del año 2000*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001; AVILÉS, Juan, “Veinticinco años después: memoria de la transición”, *Historia del Presente*, nº 1, (2002); y, AGUILAR, Paloma, “Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo en la democracia española: reflexiones en torno a la articulación y ruptura del «pacto de silencio»” en ARÓSTEGUI, Julio y GODICHEAU, François (eds.), *Guerra civil: Mito y Memoria*, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 245-293. Téngase también presente las conclusiones de, LÓPEZ PINTOR, Rafael, *La opinión pública...*, *op.cit.*; y del mismo autor: id., “El impacto del autoritarismo en la cultura política. La experiencia española en una perspectiva comparada” en CORTS GRAU, José [et al.], *Política y sociedad: estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol*, II vols., Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1987, vol. I, pp. 1063-1072. Por último, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Presentación. La «memoria democrática» como conflicto” en id. (coord.), *La memoria como...*, *op.cit.*

⁵⁶⁰ La unidad interna de un partido político es altamente valorada por los votantes como han venido reflejando diferentes estudios. No obstante, lo anterior puede conducir a un dilema de complicada resolución. Si bien, un partido se puede mantener unido y sin divisiones internas –ahí está el caso del PSOE en estos años– esto puede tener a medio y largo plazo, como veremos, unas consecuencias altamente negativas para el sistema democrático en su conjunto. De nuevo el análisis de José M^a Maravall es relevante: «Por tanto, los votantes recompensan la unidad del partido y castigan las disensiones internas. Además, suelen considerar que la voz es un signo de división, no una fuente de información. Si el partido que ocupa el poder es monolítico desde el punto de vista interno, el Gobierno tendrá más capacidad política, pero dicho partido no informará a los votantes de si el Gobierno está siendo fiel a su programa electoral o a los intereses de los ciudadanos. Paradójicamente, los votantes limitarán la contribución que la política interna en el partido podría representar para su control del Gobierno [...]. El Gobierno presentará la lealtad interna en el partido como la clave del éxito electoral». MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, pp. 160-161.

el PSOE invirtió la extraordinaria cifra de 1.129 millones de las antiguas pesetas⁵⁶¹, y aunque esta cifra no fue la más alta –UCD y AP gastarían 1.500 y 1.300 millones de pesetas, respectivamente⁵⁶²– los recursos destinados fueron optimizados en todos sus extremos.

Entre las diversas interpretaciones y teorías que se han venido formulando para explicar las motivaciones a través de las cuales los electores vinculan su voto, una nos parece especialmente útil y provechosa en este contexto. Se trata de aquella que ha teorizado la importancia del voto económico⁵⁶³. Con todas sus limitaciones, ofrece algunas pistas sobre las que detenerse. José María Maravall ha sido explícito en este campo. Junto las *raíces ideológicas* y el poderoso influjo social que guardaban todavía las siglas del PSOE, se sumó, aunque no tuviera que ser necesariamente así, una identificación entre clase social y una opción electoral:

«El PSOE tenía más de cien años de historia y podía recurrir a lealtades ideológicas y de clase, incrustada en la memoria [...]. Esta memoria histórica quizás explica por qué la influencia de las visiones de clase y de la ideología en el voto se mantuvo estable ante bruscos cambios de las condiciones económicas»⁵⁶⁴.

Esta hipótesis de trabajo no explica ni mucho menos el gran interrogante que se comenzó a formular el día 29 de octubre: ¿dónde consiguió diez millones de votos el PSOE?. O más directamente, ¿había en España en 1982 diez millones de personas que pudieran considerarse socialistas o simplemente de izquierdas? Para Mario Caciagli los más de 4.600.000 de votos nuevos atraídos por el PSOE procederían de un millón de votos de antiguos votantes de la UCD; otro millón de votantes del PCE; dos millones de votos vendrían de nuevos electores; y los 600.000 restantes se desprenderían de antiguos votantes de otras formaciones de extrema izquierda o de listas nacionalistas⁵⁶⁵. Con razón Felipe González hablaría en su día de la importancia que tuvieron los “votos prestados” de otras fuerzas políticas, y cuyos cálculos más moderados se situaban en 2.700.000 de votos. Además, el partido socialista conseguiría mantener una importante bolsa electoral de *votantes leales*. Es decir, de aquellos que ya le habían votado en 1979: un total de cinco millones y medio de votantes en un cálculo aproximado⁵⁶⁶.

Continuemos. El PSOE no solo obtendría la mayor parte de los votos de aquellos que se situaron en una posición de izquierda moderada –3-4 en la escala ideológica sobre 10– sino que conquistaría el 52% de los votos de quienes se autoubicaban en posiciones de centro-derecha moderada –5-6 en la escala ideológica– y que representaban un 32% del total de los votos obtenidos. Concretando. En lo que se refiere a la ubicación ideológica un 61% de los votantes se identificaban con la izquierda, un 12% con la extrema izquierda, y un 23% con el centro-derecha. Con lo que, en total, la autoubicación del PSOE se situaba en un 3,8 de la misma *escala*⁵⁶⁷.

También resultó significativa la distribución del voto por clases sociales y por poder económico, según diversos estudios. Por ejemplo, observemos una vez más los datos manejados

⁵⁶¹ Dato procedente de, PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González...*, *op.cit.*, p. 234.

⁵⁶² Por su parte el PCE y el CDS invertirían 250 y 700 millones de pesetas respectivamente, lo que tras los resultados electorales se convirtió tanto en un problema económico como político. Datos extraídos de: WERT, José I., “La campaña electoral...”, *op.cit.*, p. 75.

⁵⁶³ Nos remitimos aquí a lo apuntado en el apartado “2.2.8. Ciencias políticas: una bibliografía central para el estudio del socialismo y de la socialdemocracia europea a nivel comparado”.

⁵⁶⁴ MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, p. 111. Tesis mantenida también por TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, *op.cit.*, p. 56.

⁵⁶⁵ CACIAGLI, Mario, “España 1982...”, *op.cit.*, p. 107. A la hora de concretar estos resultados el autor remarcaría como el PSOE ganó especialmente más votos por la izquierda que por el centro.

⁵⁶⁶ PUHLE, Hans-Jürgen, “El PSOE: Un partido predominante y heterogéneo” en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio...*, *op.cit.*, p. 295.

⁵⁶⁷ *Ibidem*, p. 311.

por Hans-Jürgen Puhle en el que, sin duda, es uno de los análisis de referencia en este caso. En lo que respecta a los votos procedentes de un *status ocupacional alto* (13%) y con un *nivel de ingresos elevado* (12%) entre ambos sumarían un nada despreciable porcentaje, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias históricas descritas. Mientras que por, otro lado, los considerados votos de *clase alta y media alta* (10%), junto con los de *clase media y media baja* (33%), evidenciaron la penetración del *discurso socialista*, precisamente, en aquellos buscados sectores⁵⁶⁸. Otro éxito a sumar a los ya citados.

Igualmente, según arrojaron diversas encuestas, en base a la ubicación de *clase subjetiva*, la candidatura del PSOE *atraería* al 70% de la clase trabajadora y un escaso 5% de la clase alta y media-alta en su conjunto. Pero no sólo. Asimismo el PSOE atraparía el voto de otros grupos que normalmente no le hubieran votado en otras circunstancias, como los trabajadores por cuenta ajena y quienes no ejercían una actividad remunerada⁵⁶⁹. Por último cabe reseñar que el 26% de sus votantes habían estado parados en los últimos años⁵⁷⁰. Conclusión: el voto del PSOE reflejó los profundos cambios por los que había atravesado la sociedad española. Acierto, por tanto, en el *diagnóstico* como en el *pronóstico*.

Más datos, más perfiles del votante socialista. Por ejemplo, los ofrecidos por la encuesta postelectoral de diciembre de 1982 realizada por el Departamento de Estudios Electorales de la Secretaría de Imagen del PSOE. Aquel estudio establecía la siguiente caracterización sociológica del votante socialista. Primero, por *sexo*, los *hombres* representaban del total del voto el 49,3% y las *mujeres* el 50,7%. Segundo en lo que se refiere a la *ocupación* el 61,8% estaba representado por *amas de casa y no activos*, el 13,2% por *obreros especializados en la industria y los servicios*, el 8,6% por *oficinistas, vendedores y profesionales*, el 6% por *autónomos y trabajadores independientes*, el 4,6% por *obreros sin especializar de la industria y los servicios*, el 1,7% por *pequeños propietarios agrícolas*, 1,3% por *jornaleros agrícolas* y el 0,3% por *empresarios con asalariados*. Y tercero en lo que se refería a la *práctica religiosa*, el 46,1% de los votantes declaraban que tan sólo acudían algunas veces a oficios religiosos, mientras lo que no acuden a misa nunca era el 29%, y los que acuden siempre o casi siempre a misa constituían el 21,3%⁵⁷¹.

Datos y opiniones similares refleja el estudio que llevara a cabo Giacomo Sani en torno a esta convocatoria electoral. Para el politólogo italiano muy alejado de la teoría del *voto económico* o *de clase*, las claves del triunfo socialista se basaron en atraer al núcleo de los votantes movilizados⁵⁷². Un dato claro y evidente. El “voto útil” del PCE al PSOE: el 48% de los votantes comunistas de las elecciones de 1979 votarían en las siguientes al PSOE. De este modo, su explicación gira en torno a la importancia que adquirieron los *factores políticos* a la hora de decidir el voto, y que beneficiaron claramente al PSOE. Todavía más. Giacomo Sani es de la opinión de que el factor clase social apenas influyó en la decisión última, y que, por el

⁵⁶⁸ Ibídem. Además la *dirección* que el futuro Gobierno socialista tomó en aspectos concretos conducirían a «un sentimiento de gratitud hacia el PSOE y un sentimiento de hostilidad hacia UCD. El final de la crisis económica y la euforia consiguiente hicieron todo lo demás». CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, op.cit., p. 349.

⁵⁶⁹ Datos extraídos de, PUHLE, Hans-Jürgen, “El PSOE: Un partido predominante y heterogéneo” en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio...*, op.cit., pp. 299-304.

⁵⁷⁰ Ibídem, p. 306.

⁵⁷¹ PSOE, SECRETARÍA DE IMAGEN, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ELECTORALES, “Encuesta post-electoral de 1982”, Madrid, PSOE, Secretaría de Imagen / Departamento de Estudios Electorales, 1982. Encuesta realizada en diciembre de 1982 a 3.813 personas. Datos de la encuesta extraídos de, TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, op.cit., p. 87.

⁵⁷² SANI, Giacomo, “Los desplazamientos del electorado: anatomía del cambio” en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio...*, op.cit., p. 10.

contrario, variables como la edad –los más jóvenes– y la educación –los niveles más altos– tuvieron una mayor preeminencia que la normalmente otorgada⁵⁷³.

Ahora bien, en lo que los analistas coinciden es que el partido socialista supo identificarse con las tendencias predominantes de la sociedad. Lo que en la terminología politológica se llama un “catch-all party”⁵⁷⁴. Circunstancia que reduciría el número total de votantes autoidentificados como socialistas pasando de 73% al 63% en estas elecciones⁵⁷⁵. Sin duda un más que interesante dato. Por tanto, el giro al centro político por el que optaría el PSOE obtendría una respuesta sobresaliente en votos. Charles Powell lo interpretó de la siguiente forma: “En suma, no fue el electorado el que se convirtió al socialismo para dar el triunfo al PSOE, sino el PSOE es el que logró hacerse con el espacio político centrista para ganar las elecciones”⁵⁷⁶.

La cuestión generacional también influyó poderosamente en estas *críticas* elecciones. Un aspecto sobre el que volveremos más adelante, a la hora de analizar el proceso de cambio/ruptura generacional que se produjo en la sociedad española motivado en muchos de sus aspectos por las políticas desarrolladas por los gobiernos socialistas. Pero antes de adelantar acontecimientos, debe apuntarse un dato no menor: las fluctuaciones en el comportamiento electoral de la población joven. Un comportamiento que, a grandes rasgos, ha tenido un componente cíclico y, por tanto, ha estado guiado por las circunstancias políticas propias de cada convocatoria electoral⁵⁷⁷. Así teniendo presente los considerables errores porcentuales que han venido demostrando los diferentes estudios postelectorales realizados por el CIS hasta fechas más recientes, una primera nota sobresale: los jóvenes ante todo se han demostrado mucho más abstencionistas en el tiempo que los diferentes grupos de mayor edad.

En lo que aquí nos interesa destacar, tal y como ha reflejado diferentes estudios del propio Centro de Investigaciones Sociológicas, es como entre 1982 y 1989 se produciría una auténtica “hegemonía del PSOE en el electorado juvenil”⁵⁷⁸. Según el estudio postelectoral del CIS de 1982 un 59% de los jóvenes votaron al PSOE; 10% AP; 4% UCD-CDS; y un 4% PCE⁵⁷⁹. Antes de avanzar, recuérdese que vez primera pudieron votar las personas de 18 años en

⁵⁷³ Ibídem, pp. 13-15. Su defensa del modelo teórico del *comportamiento actitudinal* le lleva a plantear tres conjuntos de indicadores claves en su análisis de distribución del voto: 1) cuestiones ideológicas; 2) temas de actualidad; 3) percepción de los líderes. Véase aquí en esta línea el trabajo de, LANCASTER, Thomas y LEWIS-BECK, Michael S., “The Spanish voter: tradition, economics, ideology”, *Journal of Politics*, nº 48, (1986), pp. 648-674.

⁵⁷⁴ PUHLE, Hans-Jürgen, “El PSOE: Un partido predominante y heterogéneo” en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio...*, op.cit., p. 290. Otro acercamiento teórico sobre el mismo caso en: SATRÚSTEGUI, Miguel, “PSOE: A new catch-all party” en MARAVALL, José M^a [et al.], *Socialist parties in...*, op.cit., vol. II, pp. 33-47.

⁵⁷⁵ Datos extraídos de, PUHLE, Hans-Jürgen, “El PSOE: Un partido predominante y heterogéneo” en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio...*, op.cit., p. 293.

⁵⁷⁶ POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 327.

⁵⁷⁷ Visiones generales sobre las que más adelante se añadirán un conjunto de precisiones en: ANDUIZA PEREA, Eva, *Actitudes, valores y...*, op.cit.; MATEOS, Araceli y MORAL, Félix, *El cambio en las actitudes y los valores de los jóvenes*, Madrid, INJUVE, 2002; id. y id., *El comportamiento electoral...*, op.cit..

⁵⁷⁸ Ibídem, p. 79. Por lo demás, según los datos de la encuesta post-electoral realizada por el PSOE en diciembre de 1982, la correlación sería la siguiente: 8,9% de 18 a 21 años; 10% de 22 a 25 años; 22,3% de 26 a 35 años; 33,9% de 36 a 55 años; y 24,7% más de 55 años. PSOE, SECRETARÍA DE IMAGEN, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ELECTORALES, “Encuesta post-electoral de 1982”, Madrid, PSOE, Secretaría de Imagen / Departamento de Estudios Electorales, 1982. Datos de la encuesta extraídos de, TEZANOS, José Félix, *Sociología del socialismo...*, op.cit., p. 87.

⁵⁷⁹ Datos extraídos de, CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, *Postelectoral Elecciones Generales 1982*, Estudio, nº 1327, 1982.

vez de los 21 como había sido anteriormente norma. Continuando con aquella encuesta, la misma revela como mayoritariamente este porcentaje de jóvenes que votaron al PSOE, se autoubicaron en la escala ideológica en el margen de la izquierda de forma mayoritaria. En total un 84% de los jóvenes se identificaron entre el 3 y 4 de la escala ideológica. Un asunto que mucho tiene que ver con el llamado “voto de los debutantes”, es decir de quienes votaron por vez primera. Y ahí, de nuevo, el PSOE obtendría una clara mayoría: un 66% de los votos debutantes frente al 12% cosechado por AP⁵⁸⁰.

Igualmente resulta relevante constatar la distribución del voto por las cohortes más jóvenes en aquellas elecciones. Veamos. Las nacidas entre 1953-1956 votaron mayoritariamente al PSOE, un 53%; las nacidas entre 1957-1960, un 58%; y finalmente las últimas con posibilidades de voto, es decir, los nacidos entre 1961-1964 lo hicieron en un 66%⁵⁸¹. En resumen, la distribución del voto juvenil que capitalizó el PSOE, teniendo presente el fenómeno del *baby boom* español, pasaría a ser un factor electoral clave para explicar la abultada victoria final.

Con la confirmación de los resultados electorales amplificadas por la movilización de las bases socialistas aquel jueves 28 de octubre por la noche, se cerraba, por un lado, un ciclo político para el PSOE, y por otro, más que clausurarse una etapa política se inauguraba un nuevo periodo histórico. “Hoy todos estamos encantados” diría un conocido socialista⁵⁸². No era una simple victoria electoral, sus significados serían mucho más profundos como acertó a describir Santos Juliá:

«El PSOE era, en verdad, el partido. Sin ningún esfuerzo suplementario, los resultados electorales convencieron a sus dirigentes de que los intereses del PSOE como partido coincidirían con los intereses de la sociedad en su conjunto; que era uno con ella, su instrumento, su expresión política»⁵⁸³.

⁵⁸⁰ MATEOS, Araceli y MORAL, Félix, *El comportamiento electoral...*, *op.cit.*, p. 86.

⁵⁸¹ *Ibídem*, p. 88. Con respecto al voto conseguido por AP por cohortes para la correspondiente comparación fue el siguiente: los nacidos entre 1953-1956 un 10%; los nacidos 1957-1960 un 8%; y los nacidos entre 1961-1964 un 12%.

⁵⁸² ARAMBERRI, Julio R, “El encanto y...”, *op.cit.*, p. 7. E igualmente consúltense las reflexiones de: PARAMIO, Ludolfo, “El final del...”, *op.cit.*. Por último en aquel mismo número de *Leviatán*, Jorge M. Reverte presentaría, lejos de cualquier pretendido entusiasmo por *el cambio*, una proyección a corto plazo más realista que las dos anteriores. Decía allí: «De un gobierno socialista no cabe esperar milagros, ya que el espacio de movimiento que le queda es muy estrecho». REVERTE, Jorge M., “Una mayoría para el cambio: actores, escenario y guión”, *Leviatán*, nº 9, (1982), p. 38.

⁵⁸³ JULIÁ, Santos, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, p. 589.

5. Gabinetes «tecnocráticos» y «liberales» para los nuevos tiempos

«Nuestra preocupación es el pueblo y nuestro objetivo es conseguir que el crecimiento económico sea de todos y para todos, porque de lo contrario sería injusto apelar a la solidaridad, que constantemente estamos demandando como condición para el resurgimiento.

[...].

Por todo ello, porque nos respalda una voluntad mayoritaria y porque confiamos en el espíritu de servicio a la sociedad que, aun en la discrepancia, anima a las fuerzas políticas representativas de otros sectores, nos sentimos alentados por la más viva esperanza y nos disponemos a progresar hacia un horizonte claro mediante un programa realista».

Felipe GONZÁLEZ, *Discurso de investidura*, 1982¹.

Iconográficamente la visualización del *cambio socialista* debe sumarse como otro “éxito” en el haber de los estrategas socialistas. Si el mismísimo Antonio Gramsci habló de *ideas-fuerzas*, en nuestro caso, deberíamos de hablar de *imágenes-fuerza*². Los socialistas sabedores de su triunfo electoral, desde hacía meses, no sólo tenían planificados los equipos ministeriales, sino que, en paralelo, habían ido preparando la transición al nuevo gobierno incluyéndose aquí también un *cambio iconográfico*.

Tuvieron, pues, el tiempo necesario para generar y representar tanto el momento fundacional de la *conquista del poder político* como su consecuencia *ad hoc*: “el cambio socialista”. Un acontecimiento histórico, al igual que otros tantos episodios ya narrados, en donde supieron combinar todos y cada uno de los ingredientes necesarios para revestir el mismo del suficiente *heroísmo*, con un toque de complicidad con la sociedad, para la posterior legitimación de sus actuaciones³. Aunque también es cierto que no se evitarán determinados detalles que, prontamente, revelarían más de una interconexión con el pasado, tanto a nivel *ético* como *estético* como signo premonitorio de determinadas políticas y alianzas⁴.

Frente a la imagen de los viejos tecnócratas del franquismo aglutinados en torno a la UCD –por no citar a AP– el PSOE y sus principales dirigentes, por el contrario, ofrecerían una imagen generacional en consonancia con la nueva modernidad que pretendían llevar adelante.

¹ GONZÁLEZ, Felipe, *Discurso de investidura*, 2ª ed., Madrid, Servicio Central de Publicaciones / Presidencia de Gobierno, Madrid, 30 de noviembre de 1982, pp. 30 y 58, respectivamente.

² Sobre estos planteos teóricos remitimos a lo mencionado en la *Presentación*.

³ No tardaría en llegar por parte de la organización socialista un relato *ad hoc*, excesivamente edulcorado, sobre la llegada, configuración y toma de posesión del primer Gobierno socialista. Un primer conato a modo de versión oficial del socialismo, ahora, en el poder. Nos referimos, en concreto, a, GONZÁLEZ, Felipe y GUERRA, Alfonso, *Felipe González, de..., op.cit.*, pp. 137-ss. Obras ampliamente criticadas tanto desde ámbitos periodísticos pero también a nivel histórico, tal y como hicieron Justino Sinova y Javier Tusell cuando hablaban del «frecuente triunfalismo que los socialistas suelen practicar cuando hablan de sí mismos». SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *El secuestro de..., op.cit.*, p. 21. Una construcción *heroica* a la par que *mesianica* que se ha mantenido a lo largo del tiempo: «La mirada de mi hijo desde el retrato enmarcado me había impulsado a soñar: lo que íbamos a hacer por España desde aquel día de diciembre de 1982 representaría un formidable avance en la historia de nuestro país, un país demasiado castigado en el pasado. Ahora un grupo de jóvenes nacidos después de la Guerra Civil se enfrentaba a una tarea ambiciosa, difícil, pero llena de esperanza y de ilusión. Había que ponerse al trabajo, más ¿por dónde empezar?». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los..., op.cit.*, p. 25.

⁴ «Cuando vi la ceremonia [de toma de posesión del Presidente del Gobierno] en la pantalla de televisión, me enfadé. Por respeto y prudencia no habíamos intervenido en la organización del ritual de la toma de posesión. Me di cuenta de que Felipe prometió el cargo ante un crucifijo y con la mano apoyada en la Biblia». Id., *Cuando el tiempo..., op.cit.*, p. 439.

Aunque Felipe González ya no vestía su “mítica” cazadora de pana, excepto en contadas ocasiones, los socialistas habían sido capaces de “adaptarse” a los tiempos con otros tonos menos grisáceos. No sólo es que procederían de otra generación –en concreto de la mitificada “Generación del 56”⁵y/o la del “68”⁶– que no había vivido la guerra civil en primera persona, sino es que transmitían nuevas sinergias para los tiempos que se avecinaban. Ejemplo de lo anterior fue la fotografía del primer Gobierno socialista, o, la propia contextualización que acompañó al discurso de investidura de Felipe González un martes 30 de noviembre de 1982⁷.

La primera y más importante dimensión visual de aquel *cambio histórico* era precisamente que, por vez primera, desde 1939 en España había un gobierno de izquierdas elegido por las urnas.

«Estamos viviendo una jornada histórica y decisiva para nuestro futuro –señalaba al principio del discurso de investidura Felipe González–. Histórica, porque hoy comienza el cambio; decisiva, porque desde los primeros pasos por el nuevo camino empezamos ya a ir configurando su trazado»⁸.

Lo señaló en su día el profesor Julio Aróstegui: empezaba “un nuevo momento histórico” que marcaría la vida del país durante “los siguientes catorce años”. Con el añadido de que en “toda la historia constitucional española desde el siglo XIX no se había producido nunca una situación de gobierno de un solo partido durante un periodo tan prolongado”⁹.

⁵ Un ejemplo significativo de la defensa del papel histórico de esta generación en todos sus extremos en, JULIÁ, Santos, “Cambio social y cultura política en la transición a la democracia” en MAINER, José Carlos y id., *El aprendizaje de..., op.cit.*. Véanse igualmente, MARAVALL, José M^a, *Dictadura y disenso..., op.cit.*; LIZCANO, Pablo, *La Generación del 56: la Universidad contra Franco*, Barcelona, Grijalbo, 1981. Un último repaso por la biografía grupal de esta generación en, LÓPEZ PINA, Antonio (ed.), *La generación del 56*, Madrid, Marcial Pons, 2010, con las intervenciones de no pocos socialistas que han aparecido o aparecerán en las siguientes páginas: Miguel Boyer, Elías Díaz, Luis Gómez Llorente, Gregorio Peces-Barba...

⁶ Para quien fuera un excelente conocedor de las *interioridades* del socialismo español contemporáneo, Javier Pradera, es, justamente, la afluencia de militantes de lo que denomina la «estela del 68» en donde estarían incluidos «trotskistas, militantes del FLP, maoístas o miembros del FRAP», junto con el proceso de *unidad socialista* y los expulsados del PCE por Santiago Carrillo, donde el socialismo encontraría el material humano clave para sostener todo el aparato del poder tanto dentro como fuera del Gobierno: «Crisol de gentes procedentes de tan diversas tendencias, el remozado partido socialista añadió a su legitimidad de origen *pablista* la legitimidad de ejercicio derivada de haberse convertido en representante de la izquierda de toda una generación. Ese componente *generacional* y el vínculo de solidaridad forjado por la *memoria antifranquista* más allá de las militancias partidistas específicas explican en buena parte el crédito del que han disfrutado los socialistas durante esta década». PRADERA, Javier, “Las pasiones del poder: el PSOE tras diez años de Gobierno” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista..., op.cit.*, p. 268. Véanse también, RÍOS, César Alonso y ELORDI, Carlos, *El desafío socialista..., op.cit.*, y el Capítulo 4, *nota 340 y nota 341*.

⁷ Con todo para el propio Felipe González aquella fotografía carecería de la importancia aquí dada: «Aquella foto de la escalinata de La Moncloa, con mi primer Gobierno, la verdad es que aquel momento no provoca en mí un sentimiento especial, quizás porque, mucho antes, ya tenía interiorizado con quién iba a trabajar. Lo que sí pesa en mi recuerdo es la reflexión sobre la gente con la que arrancaba para emprender la tarea». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada..., op.cit.*, p. 806. Para uno de los biógrafos, casi a título oficial, del propio Presidente del Gobierno, sin embargo, aquella misma fotografía tenía otro significado más profundo en clara relación con el relato *heroico* que se ha pretendido ofrecer: «Vista la fotografía desde el marco simbólico de la política quedaba atractiva y prometedora. Resultaba un equipo equilibrado, y el hecho de que algunos rostros fueron casi desconocidos o novedosos despertaba la lógica curiosidad de lo incierto». PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González..., op.cit.*, p. 256.

⁸ GONZÁLEZ, Felipe, *Discurso de investidura..., op.cit.*, p. 9.

⁹ ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España..., op.cit.*, pp. 247 y 311, respectivamente.

Bajo tres principios de gobierno –la *paz social*, la *unidad nacional* y el *progreso*¹⁰– y cuatro ejes de actuación –la *lucha contra la crisis económica y el paro*, el *avance hacia una sociedad más libre y más igualitaria*, la *reforma progresiva del Estado* y la *proyección hacia el exterior, digna y eficazmente, de la realidad de España*¹¹– se asistía a la apertura de la época socialista. Y lo hacía bajo un discurso tecnocrático, moderado en las formas y vacío de contenido en lo programático, en donde lo *económico* ya sustituyó a la *política*¹². Pero no sólo, pues de allí se desprendían varios mensajes a la clase empresarial que, más pronto o más tarde, se verían reflejados en el B.O.E.:

«A este respecto, el sector público, además de una palanca básica para estimular y apoyar iniciativas prioritarias, tiene la posibilidad de ofrecer una gama de servicios sociales que son hoy irrenunciables en todos los países avanzados.

Ello no contradice el que en un sistema económico como el español sea el sector privado el que en medida decisiva determine el volumen de los bienes y servicios producidos, de la inversión y del empleo [...]. Por ello nuestra política económica estimulará, tanto como pueda, todas las iniciativas creadoras, con facilidades adicionales para aquellas empresas de dimensión modesta, que por ello encuentran más dificultades para ser atendidas por los intermediarios financieros o para exportar a los mercados exteriores»¹³.

Sin renunciar a una política de “planificación acordada, no impuesta”, se concretaban unos objetivos macroeconómicos que iban a convertirse en la deseada *válvula de escape* de la crisis económica. Por lo demás, el deseo de colaboración con el mundo empresarial quedaba explícito y claro. “De este modo se reducirán incertidumbres empresariales, se facilitará la toma de decisiones públicas y privadas y se aumentará la coherencia entre ellas”. El mensaje del futuro presidente del Gobierno no sólo estaba dirigido a los empresarios, sino que además trató de tranquilizar a todos aquellos otros sectores no *afines*, jerarquía católica y fuerzas armadas por delante, advirtiéndoles que los cambios en las áreas centrales de gobierno no conllevarían desmanes ni posiciones radicales. Finalmente concluía con un mensaje de futuro –con cierto toque populista– a la nueva generación de jóvenes que, en breve, conocería las *alegrías* y los *sinsabores* de las políticas socialistas:

«Y esa esperanza se refuerza para el futuro al comprobar cómo nos alienta muy especialmente los jóvenes, en quienes están arraigando con fuerza los valores de la solidaridad, el compromiso libremente asumido, que tanto importan para nuestro proyecto común»¹⁴.

Ahora bien, realizadas estas oportunas consideraciones, debe decirse que el *cambio socialista* tuvo mucho de continuidad, al menos, para las cuestiones que nos son de interés. Daba comienzo, por tanto, lo que Andrés Carabantes denominó la “estrategia de los frentes posibles”¹⁵. Es decir, un proyecto de Gobierno que fuera atendiendo, paso por paso, los

¹⁰ GONZÁLEZ, Felipe, *Discurso de investidura...*, *op.cit.*, pp. 10-11.

¹¹ *Ibidem*, pp. 13-14.

¹² Consúltense, por ejemplo, las siguientes noticias y editoriales aparecidos –junto con sus respectivas portadas y fotografías– en dos de los principales medios de comunicación del país: Noticia, “Ausencia de concreciones y plazos en el discurso de investidura de Felipe González ante el Congreso”; Editorial, “El comienzo del debate de investidura”, ambos en *El País*, 1 de diciembre de 1982; Editorial, “El discurso de investidura”, *ABC*, 1 de diciembre de 1982.

¹³ GONZÁLEZ, Felipe, *Discurso de investidura...*, *op.cit.*, pp. 26-27.

¹⁴ *Ibidem*, p. 59.

¹⁵ CARABANTES, Andrés, *Balance y futuro...*, *op.cit.*, pp. 184-ss. Señalaba también el autor: «Se adoptó entonces la estrategia de los frentes posibles, impulsada al parecer por la aparente frialdad del físico y economista Miguel Boyer, un enamorado de la eficacia. Hay que elegir cada año los frentes que se puedan mantener sin riesgo. A dos o tres objetivos por año, en ocho años se habrían puesto en marcha todos los objetivos y algunos se habrían alcanzado enteramente». *Ibidem*, p. 187. De muy diferente opinión sería el propio Alfonso Guerra: «Esa era nuestro riesgo, acudíamos a todos los problemas a la vez: pero... ¿era posible hacer otra cosa sin decepcionar tantas esperanzas? La respuesta es obvia: aunque fuese lo más sensato, no teníamos margen para establecer un calendario de reformas, habíamos de

principales problemas del país. De hecho, si en ámbitos como la Cultura con Javier Solana, la Educación con José M^a Maravall o en el caso de Sanidad con Ernest Lluch a la cabeza, se producirían significativas rupturas con el pasado; en cambio, en aspectos claves y sensibles como la economía, la industria y el mundo del trabajo –precisamente las carteras con mayor gasto– lo que predominó fue la conexión con el pasado más reciente¹⁶.

5.1. Las *idas y venidas* en el Consejo de Ministros: breve y ajustado relato de la composición de los gobiernos socialistas en la «década del cambio»

El propio Felipe González sería el encargado personal de diseñar el primer ejecutivo. Operación que se repetiría con enorme similitud con respecto a los otros cuatro “gobiernos” de este tiempo aquí considerado. En concreto, nos detendremos de forma específica en los equipos técnicos de Economía, Industria y Trabajo.

A través del BOE empezaría la configuración institucional de unas nuevas élites políticas que abarcarían y concentrarían el poder político en mayúsculas durante tres lustros¹⁷. Las posteriores crisis gubernamentales de los gobiernos entre 1982 a 1992 son altamente ilustrativas, no sólo de una particular concepción del poder elitista, sino en lo que nos interesa de la apuesta decidida, más allá de coyunturas y contextos políticos, por una política económica determinada que se va a mantener, sin apenas fisuras, durante la “década del cambio”. Se modificaron cuando fue oportuno determinadas líneas de gobierno ya fuera en agricultura, educación, cultura, sanidad u en otros tantos ámbitos de actuación, pero no fue así en los campos estrictamente económicos. Una cuestión que puede observarse, básicamente, a través de los cambios de ministros y de sus respectivos equipos en las carteras de Economía, Industria y

abordarlos simultáneamente, si no queríamos provocar el desencanto social». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., p. 76.

¹⁶ Véase, primero, SOLANA, Javier, *Perspectivas de política cultural: comparecencia del Ministro ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, septiembre de 1986*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1986; RODRÍGUEZ ARÓSTEGUI, Juan Arturo, *La política cultural del Estado de los gobiernos socialistas, 1982-1986*, Gijón, Trea, 2003; segundo, MARAVALL, José M^a, *El desarrollo de la reforma universitaria. Discurso pronunciado en el Pleno del Consejo de Universidades, Santander, septiembre de 1986*, Madrid, MEC Centro de Publicaciones, 1986; id., *La reforma de la enseñanza*, Barcelona, Laia, 1987; GONZÁLEZ-ANLEO, Juan, *El sistema educativo español*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1985; y, desde una perspectiva crítica, ASENJO, Milagros, *El camaleón. Educación: la gran estafa socialista*, Barcelona, Tibidabo, 1992. Asimismo, véase el estado de la cuestión que se presentó en, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, *Libro blanco para la reforma del sistema educativo*, Madrid, MEC, 1989; y, tercero, SÁNCHEZ BAYLE, Marciano, *Hacia el estado de malestar: neoliberalismo y política sanitaria en España*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1998. Y aquí también léanse los esfuerzos del PSOE por transmitir a la ciudadanía sus avances en, PSOE, *Política sanitaria en atención primaria de salud*, Madrid, PSOE, 1986. Un balance crítico y conservador a la vez sobre las anteriores cuestiones en, PÉREZ-DÍAZ, Víctor, CHULIÁ, Elisa y ÁLVAREZ-MIRANDA, Berta, *Familia y sistema del...*, op.cit., junto con el trabajo básico de, NAVARRO, Vicenç, *Bienestar insuficiente, democracia...*, op.cit..

¹⁷ Junto con la amplia bibliografía apuntada en el apartado “2.2.8. Ciencias políticas: una bibliografía central para el estudio del socialismo y de la socialdemocracia europea a nivel comparado” y en el Capítulo 4, nota 3, consúltense: RULL SABATER, Alberto, *Diccionario sucinto de Ministros de Hacienda (siglos XIX y XX)*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991; OLÍAS de LIMA, Blanca, “Los Gabinetes de los Presidentes de Gobierno en España”, *Política y Sociedad*, n° 16, (1994), pp. 257-272; AINAUD, Josep, *Ministros catalanes en Madrid*, Barcelona, Planeta, 1996; CUENCA TORIBIO, José Manuel y MIRANDA, Soledad, *El poder y sus hombres: ¿por quienes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998)*, Madrid, Actas, 1998; SAMPEDRO, José Luis, y ALOS MERRY, Fernando, *Ministros de Hacienda y Economía de 1700 a 2005: tres siglos de historia*, Madrid, Ministerio de Hacienda / Centro de Publicaciones, 2003; GENIEYS, William, *Las élites españolas ante el cambio de régimen político. Lógica de Estado y dinámicas centro-periferias en el siglo XX*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2004. Por último, buena parte de este capítulo no se hubiera podido llevar a cabo sin la información aportada en su día por Gustavo Muñoz Barrutia.

concretamente de Trabajo. Los ministerios claves para la *estrategia de la modernización*. Por tanto, el examen –aunque sólo sea superficial– de los sucesivos gobiernos deviene en central. Al análisis de la trayectoria profesional, académica e ideológica de sus máximos responsables, pero también de sus equipos, está dedicado el presente apartado.

Es a partir de un conjunto de *pistas* interconectadas que se vinculan a estos mismos movimientos de ministros y ministrables, la vía por donde puede llegar a observarse, nítidamente, no sólo la tesis principal que aquí se mantendrá –la permanencia de la estrategia de *modernización liberal* en el tiempo– sino las luchas, conflictos y enfrentamientos en sus diversas manifestaciones –partido-Gobierno, sindicato-partido, sindicato-Gobierno– que están detrás de muchas de las *entradas y salidas* del Consejo de Ministros, y con las mismas de sus órganos de poder, de sus órganos de decisión. No se trata tan sólo de nombramientos, sino de algo más sustancial: las *batallas* por controlar tanto el poder gubernamental como la dirección del equipo económico. En resumen, nos encontramos ante uno de los ejemplos más acabados de la conexión entre el Partido, el Gobierno, el Poder, pues como advirtió Javier Pradera, “[i]dentificado el PSOE con el Gobierno, el Gobierno con el Estado y el Estado con la nación, apenas queda espacio para las discrepancias dictadas por la buena fe y los intereses legítimos”¹⁸.

Una cuestión que todavía cobra más relevancia si tenemos presente que se gobernaría desde el Gobierno, quedando el Partido como sujeto político secundario, a modo de “correa de transmisión” –y no siempre–. Avanzada la década de los ochenta –tal y como se explicará detalladamente en el III epígrafe, *Los ejecutivos socialistas y la reestructuración del modelo capitalista español*– la sucesión de acontecimientos dentro del socialismo español, irá adquiriendo una mayor importancia no tanto por la línea política económica adoptada, sino sobre todo por el progresivo deterioro de la confianza interna entre las diferentes familias en liza. A ello se sumará, también, el control político de la organización –elementos claves para asegurar su supervivencia electoral– lo que tendrá, a corto plazo, sus reflejos en algunos de los cambios en los gabinetes socialistas. No obstante, desde una perspectiva a largo plazo, estos sucesos no modificarían la que siempre sería una estructura de poder piramidal y fuertemente jerarquizada.

En plena *embriaguez* de triunfo, el que era Presidente de Gobierno avisaría de que para llevar adelante aquel programa de *forma realista* necesitarían veinticinco años¹⁹. El PSOE llegaba al poder para quedarse instalado en él. Una fuerte convicción se hizo eco en las filas socialistas: el socialismo podría gobernar durante tantos años, mientras que no se cometieran grandes atropellos ni errores. La *misión histórica* comenzaba a materializarse. El pensamiento de Gramsci volvía a observarse con toda fuerza: alcanzada la “hegemonía política” tocaba conquistar la “mayoría para el cambio”²⁰.

Pronto la conquista del poder daría paso a lo que se denominaría como la “herencia recibida” o el “legado del pasado”²¹. O simplemente la “cara oculta de la realidad”²². Una *nueva*

¹⁸ PRADERA, Javier, “Las pasiones del poder: el PSOE tras diez años de Gobierno” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, op.cit., p. 282. Para una formulación teórica sobre esta complicada relación, ELORZA, Antonio, “Las raíces del «fenómeno socialista»” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., pp. 65-ss.

¹⁹ Se toma aquí ‘prestado’ el término *embriaguez* empleado por Nicolás Redondo en declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, op.cit., p. 214.

²⁰ Véanse aquí las tesis mantenidas en un conocido documento AHFFLC, PSOE-CEF, “Documento de estrategia”, Madrid, octubre de 1983, sig. AI-647-08 p. 13, y citadas ya en la *Presentación*. Consúltese al respecto la interesante aportación de, SOTELO, Ignacio, “Poder institucional y..., op.cit., pp. 47-56.

²¹ FERNÁNDEZ BLANCO, Matilde, “Las políticas sociales en la década de los ochenta. Importancia y vigencia de las políticas de bienestar social” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José

consigna que calaría, rápidamente, entre la opinión pública. No faltaría día en que los socialistas ya en el gobierno se lamentaran amargamente ante su situación de partida. Roberto Dorado, Director del Gabinete de Presidencia del Gobierno entre 1982 y 1991, y uno de los “fontaneros” y estrategas del PSOE²³, señalaría al respecto:

«No conviene olvidar que al comienzo de la gestión del gobierno socialista todavía pesaban sospechas sobre el futuro de la democracia, la situación económica era inestable, el Estado de las Autonomías estaba a medio construir, estaba abierta nuestra ubicación en Europa y había interrogantes y recelos por la primera experiencia del gobierno socialista en medio siglo»²⁴.

Estas primeras “percepciones” apuntaban algunos aspectos sintomáticos de las futuras formas de actuación de los gobernantes. Pero a los socialistas aquel conocido discurso de la *herencia recibida*, les serviría, en primer lugar, para remarcar su política de responsabilidad con España, así como de justificación para enmendar los iniciales errores y decisiones. Justino

Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 234. El tema de la *herencia recibida* se convertirá en una constante en la documentación interna del PSOE en aquellos primeros momentos de gobierno. «El Partido Socialista, además, ha asumido esta misión en medio de una crisis económica que la debilidad política y la ausencia de proyecto de los anteriores gobiernos de la derecha impidió afrontar a la vez en otros países europeos». AHFFLC, PSOE-CEF, “Documento de estrategia”, Madrid, octubre de 1983, sig. AI-647-08, p. 6. Una visión crítica sobre la *herencia recibida* en, SARTORIUS, Nicolás, “Dos años de gestión del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 10. En aquel mismo volumen otro de los participantes –Andreu Claret– señalaría también: «Estamos ante un caso muy singular, ante un modelo neoliberal en el terreno económico, de claro sesgo conservador [...]. A mí me parece fundamental para juzgar la política de este gobierno, a los dos años, porque sus resultados ya no tienen que ver con las dificultades encontradas al alcanzar el gobierno, con las resistencias en las que uno podía no haber pensado antes de presentarse en las elecciones con el programa electoral del PSOE; tiene que ver con una opción política explícita, deliberada, consciente, a la que, además se refiere de modo cada vez más abierto los responsables de la política económica del gobierno con el aval del propio presidente». CLARET, Andreu, “¿Hacia dónde va el Gobierno PSOE?” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 54. Al respecto se volverá con detenimiento en el apartado “6.2. La «salida progresista»: a la crisis”.

²² AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria de gestión 1981-1984 [al] 30º Congreso, Madrid, 13-16 diciembre”, Madrid, PSOE-Comité organizador del XXX Congreso, 1984, sig. Fc 279, p. 12.

²³ Sobre las funciones y concretamente sobre el ‘poder’ de este órgano, OLÍAS DE LIMA, Blanca, “Los Gabinetes de..., *op.cit.* Véase aquí la estructura administrativa orgánica que se dará al primer Gabinete de Presidencia a través del Real Decreto 3773/1982, de 22 de diciembre, *por el que se determina la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno* [B.O.E. 24 de diciembre de 1982]. El equipo de Gabinete de Presidencia estaría formado por las siguientes personas: Dirección: Roberto Dorado en la etapa de Alfonso Guerra y por Antonio Zabalza con Narcís Serra como Vicepresidente del Gobierno. Como subdirector hasta su salida en 1985 su pronta salida, Francisco Fernández Marugán. Los otros máximos responsables serían: Departamento de Análisis: Miguel Iceta Llorens; Asuntos Institucionales: Luis Ortega Alvarez, Alejandro Trigo Morterero y Pedro Sánchez del Corral; Asuntos Sociales: Alberto Ruiz Secchi, Mariano Casado González y Estaban Rodríguez Vera; Seguridad y Defensa: José Antonio Blanco Romero y Jesús Martialay Romero; Economía: Juan Antonio Blanco Magadán, Aurelio Martínez Estévez, Miguel Ángel Lasheras Merino y María Antonia Mones Farré; Educación y Cultura: Mariano Pérez Galán; Estudios: Carlos Alonso Zaldívar y Andrés Ortega; Internacional: Juan Antonio Yáñez-Barnuevo y José María Pons Irazazábal. Datos procedentes de, HERRERA, José Díaz y DURÁN, Isabel, *Pacto de silencio...*, *op.cit.*, p. 56, *nota 4*; GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, *op.cit.*, p. 39; y de, Noticia, Joaquín Prieto, “Los hombres clave”, *El País*, 22 de julio de 1984.

²⁴ DORADO, Roberto, “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 61. Véase también, id., “Estrategia socialista para la década de los años 90” en GUERRA, Alfonso [et al.], *Nuevos horizontes teóricos...*, *op.cit.*, pp. 129-147. Por su parte el propio Guerra le definiría de la siguiente forma en relación a la preparación de la campaña del 82: «Solicité ayuda de Roberto Dorado, un inteligente y trabajador colaborador en la conformación de la estrategia política del Partido durante años». Id., *Cuando el tiempo...*, *op.cit.*, p. 423.

Sinova y Javier Tusell han ido más lejos en su crítica al (auto)victimismo de los socialistas: “Los dirigentes socialistas ponían en práctica, una vez más, su pasión por el dominio de las técnicas comunicativas –en las que se les suele considerar especialistas consumados– y trataban de vendarse la herida antes de recibirla”²⁵.

El 3 de diciembre de 1982 se constituía el primer gobierno de la época socialista, con la *misión* de asentar el orden democrático²⁶. Tras un largo goteo de nombres y candidatos para ocupar los ministerios, en donde no faltaron las sorpresas –ni los *disgustos* propios y ajenos²⁷– se daría a conocer la composición del gabinete socialista²⁸. Los “elegidos” procedían en su

²⁵ SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *La crisis de...*, *op.cit.*, p. 22. De hecho como apuntaban ambos autores en lo que no dejaba de ser una cierta *glorificación* del proceso de la transición postfranquista: «Los socialistas, por el contrario, habían recibido un Estado en orden, con paz y vacunado ya de golpismo, la mayor amenaza contra la obra de la Transición». *Ibidem*, p. 20.

²⁶ Tenemos a nuestra disposición dos interesantes relatos sobre esta cuestión. Primero en, SOTILLOS, Eduardo, 1982, *el año clave...*, *op.cit.*. Periodista de profesión fue una de las ‘caras’ visibles de TVE al presentar los telediarios de la entonces única cadena durante la transición postfranquista. Militante socialista desde 1979, tras su breve paso como Director de Radio Exterior de España y de RNE y como también director de *La Tribuna Vasca*, Eduardo Sotillos sería nombrado Portavoz del Gobierno con categoría de Secretario de Estado. Él que hoy es Director y Comunicación de Estrategia del Partido Socialista de Madrid estaría al lado de Felipe González hasta 1985. A partir del citado libro, nos ha dejado uno de los testimonios claves para interpretar los ‘entresijos’ de la Moncloa. Un segundo aporte de notable importancia ya citado en: FEO, Julio, *Aquellos años...*, *op.cit.*. Sobre su capacidad de control y de influencia véase, Noticia, Joaquín Prieto, “Se abre la puerta y es Feo”, *El País*, 22 de julio de 1984.

²⁷ Es un lugar común resaltar la profunda decepción y enfado de Alfonso Guerra al enterarse del nombramiento de Boyer como Ministro de Economía. Probablemente, uno de los mejores relatos lo encontramos a través de Cándido: «No recuerdo bien cuándo vi por vez primera a Guerra; me parece que fue en la antigua sede madrileña del PSOE, en Santa Engracia, una tarde que fui a hacerle una entrevista en el peor momento, pues acaba de mantener con González una discusión, que se debió ser muy dura y amarga, sobre la formación del equipo económico, con Miguel Boyer a la cabeza». CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, *op.cit.*, pp. 50-51.

²⁸ La composición del primer gobierno socialista sería la siguiente: Presidente del Gobierno: Felipe González Márquez; Vicepresidente del Gobierno: Alfonso Guerra (1982-1991); Ministro de Economía: Hacienda y Comercio: Miguel Boyer (1982-1985); Ministro de Asuntos Exteriores: Fernando Morán (1982-1985); Ministro de Justicia: Fernando Ledesma Bartret (1982-1988); Ministro de Defensa: Narcís Serra (1982-1991); Ministro de Interior: José Barrionuevo (1982-1988); Ministro de Obras Públicas y Urbanismo: Julián Campo (1982-1985); Ministro de Educación y Ciencia: José María Maravall (1982-1988); Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Joaquín Almunia (1982-1986); Ministro de Industria y Energía: Carlos Solchaga (1982-1985); Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: Carlos Romero (1982-1991); Ministerio de la Presidencia: Javier Moscoso (1982-1986); Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones: Enrique Barón (1982-1985); Ministro de Administración Territorial: Tomás de la Quadra-Salcedo (1982-1985); Ministro de Cultura: Javier Solana (1982-1988); Ministro de Sanidad y Consumo: Ernest Lluch (1982-1986); Portavoz del Gobierno: Eduardo Sotillos (1982-1985). Otros cargos de alta relevancia institucional: Presidente del Congreso: Gregorio Peces-Barba (1982-1986); Presidente del Senado: José Federico de Carvajal (1982-1989). Finalmente como Presidente del Consejo de Estado: Antonio Hernández Gil (1982-1985). Sobre la formación de este primer gabinete, con sus idas y venidas de candidatos, véanse sucesivos testimonios en las entrevistas recogidas en, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*; y especialmente la abundante información manejada en, RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en...*, *op.cit.*, pp. 250-255. Por lo demás, entre *asesores* y *equipo de confianza* de Felipe González en La Moncloa se llegaría a tener en nómina a más de trescientas personas. No sólo, pues, durante la época socialista los altos cargos –niveles 28, 29 y 30– se multiplicarían exponencialmente: “[L]os 2.711 altos cargos de la Administración que dejó Leopoldo Calvo-Sotelo cuando abandonó el poder en diciembre de 1982 se han convertido en los 7.890 que ha heredado José María Aznar trece años y cinco meses después lo que representa un incremento de un 291 por ciento”. Datos procedentes de, Noticia, Joaquín Prieto, “El discreto influjo de los «monclovitas»”, *El País*, 22 de julio de 1984; y, HERRERA, José Díaz y DURÁN, Isabel, *Pacto de silencio...*, *op.cit.*, pp. 55 [a partir de los propios datos que ofreciera en su momento el Ministerio de la Presidencia Alfredo Pérez Rubalcaba en marzo de 1994] y 327, respectivamente

mayor parte de extracción universitaria y habían ocupados altos cargos técnicos en el sector público y en el sector privado. Ninguna mujer participaría en un gabinete de edad media bastante joven y con perfil generacional muy marcado²⁹. Asimismo ha de apuntarse, como destacó Juan Rodríguez Teruel, como “no existía un sistema de representación de cuotas internas del partido”, y de hecho, el Ministro Fernando Ledesma ni siquiera estaba afiliado al PSOE³⁰.

Por otra parte, como indicó el propio González a “la hora de formar mi primer Gobierno busqué, en todos los casos, a las personas que podían identificarse mejor con el proyecto: a Solchaga, a Boyer..., a todos”³¹. Por lo demás, Alfonso Guerra mostraría sus reticencias a entrar en el mismo, pues tuvo por intención inicial la de controlar desde fuera del Gobierno la organización y las relaciones partido-sindicato³².

Como se ha adelantado en todo este proceso hubo dos nombres que figuraron inexorablemente en todas las *quinielas*: Miguel Boyer, como Ministro de Economía, Hacienda y Comercio³³ y Carlos Solchaga como Ministro de Industria³⁴. Todo un mensaje a la clase

²⁹ Como informaba *El País* tan sólo dos mujeres ocuparían, respectivamente, dos secretarías de Estado. A saber: María Izquierdo, Secretaría de Estado para las Autonomías; y, Carmina Virgili, Secretaría de Estado para Universidades e Investigación. Noticia, “El Consejo de Ministros nombrará cerca de ochenta altos cargos”, *El País*, 7 de diciembre de 1982. Consúltense, PSOE, *Documento sobre índices de representación de mujeres socialistas*, Madrid, PSOE / Secretaria de la Mujeres, 1985; y, PSOE, *La participación de las mujeres en el PSOE y en las Instituciones Públicas*, Madrid, PSOE / Secretaria de Igualdad, 2002. Asimismo sobre la participación de las mujeres en la élite de la política española se disponen ya de estudios consolidados, entre los que destacan: GARCÍA DE LEÓN, M^a Antonia, *Élites discriminadas: sobre el poder de las mujeres*, Madrid, Anthropos, 1994; URIARTE, Edurne y RUIZ, Cristina, “Mujeres y hombres en las élites políticas españolas: ¿Diferencias o similitudes?”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 88, (1999), pp. 207-232; o, VERGE, Tània, “Mujeres y partidos políticos en España: las estrategias de los partidos y su impacto institucional, 1978-2004”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n°115, (2006), pp. 165-196. En cuanto a la juventud de este primer gobierno, por ejemplo, Felipe González tenía cuarenta años; Alfonso Guerra cuarenta y dos; Miguel Boyer cuarenta y tres; Carlos Solchaga, treinta y ocho; Javier Solana, cuarenta; Joaquín Almunia treinta y cuatro siendo de hecho el ministro más joven. Como declararía quien fuera Presidente del Gobierno, la composición generacional de aquel Gabinete era evidente, si se exceptúa la presencia de Fernando Morán: «Cuando trabajaba en la formación del equipo, yo notaba, desde el principio, que había una limitación, la limitación que siempre representa el horizonte generacional. Como el cambio histórico también era un cambio generacional, esa limitación, en parte, me dolía. Pero se daba el caso de que yo no veía fuera de mi horizonte generacional, ni hacia arriba ni hacia abajo». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 807.

³⁰ RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en...*, op.cit., p. 254 y nota 319.

³¹ En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 807.

³² GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, op.cit., pp. 38-ss.

³³ Miguel Boyer Salvador (San Juan de Luz, Francia, 1939). Licenciado en Ciencias Políticas y Comerciales, pero también en Ciencias Físicas –cuestión esta última que normalmente ha pasado desapercibida– por la hoy Universidad Complutense de Madrid. Proveniente de una familia con importantes vínculos económicos y financieros, desde muy pronto ocuparía cargos de notable relevancia en el Servicio de Estudios del Banco de España a través de un concurso-oposición. Asimismo su experiencia profesional se nutriría de su paso por el Servicio de Estudios del INI así como en empresas como la Unión Explosivos Río Tinto bajo la dirección de Leopoldo Calvo-Sotelo. Igualmente sería director de Planificación y Estudios del Instituto Nacional de Hidrocarburos durante el mandato de Carlos Boada. Durante aquellos años tomaría contacto con otros tantos hombres claves de la economía española –entre otros, José Manuel Kindelán– y de miembros del futuro gabinete socialista –entre otros, Francisco Fernández Ordóñez o el propio Carlos Solchaga–. Militante socialista desde los setenta, previamente participó en la Agrupación Socialista Universitaria y en otras organizaciones estudiantiles hasta su ingreso en el PSOE. En 1962 caería junto con Luis Gómez Llorente y Miguel Ángel Martínez siendo encarcelado durante seis meses en la madrileña prisión de Carabanchel, acusados de reorganizar las Juventudes Socialista de Madrid. Tras su breve paso por la cárcel abandonaría temporalmente toda

empresarial. La justificación para la elección del primero de los citados, según el propio ex-Presidente de Gobierno, radicaría en la imagen de “sabio atómico” que ofrecía Miguel Boyer así como en su capacidad de *generar confianza*³⁵.

actividad política. A los pocos años volvería a afiliarse al PSOE ocupando diversos cargos. Tras un trasiego de *entradas y salidas* en lo que respecta a su militancia, sería tras el Congreso de Suresnes de 1974 cuando Felipe González comenzaría a fijarse en Miguel Boyer. De hecho, el que fuera Ministro de Economía, junto con el ya fallecido Mariano Rubio y Carlos Bustelo, redactaría la ponencia económica del XXVII Congreso socialista de 1976 [véase lo apuntado en el Capítulo 4, *nota 87*]. Tras otra salida del PSOE por considerar excesivamente radical la organización, volvería ya definitivamente en 1977 a las riendas socialistas convirtiéndose, de hecho, en uno de los principales asesores del mismo Felipe González. Todo ello tras haber recalado, brevemente, en el Partido Socialdemócrata de su amigo Francisco Fernández Ordóñez. En las elecciones de 1979 obtendría el acta de diputado por Jaén tras los vetos del propio Alfonso Guerra y Joaquín Almunia para presentarse por Madrid. En todo caso, y a pesar del *manto protector* del mismo Secretario General, esto no le evitaría sucesivas disputas con destacados miembros del PSOE. Después de su paso por el Ministerio de Economía y Hacienda, que apenas duró dos años y medio –un corto periodo teniendo presente que los ministros durante los Gobiernos socialistas de media estuvieron al frente de sus carteras de 3 a 4 años– comenzaría, de nuevo, a trabajar en el sector privado –entre otros cargos estaría en la empresa FCC e igualmente sería Consejero de Urbis– tras su también corta estancia como presidente del Banco Exterior entre 1985 y 1988. Igualmente pasaría por los asientos del Consejo Red Eléctrica. Abandonó el PSOE en 1996. Tras su siempre comentado paso por la FAES, en el último tramo del ejecutivo encabezado por Zapatero volvería a la Moncloa, en esta ocasión como miembro de Comisión Asesora de Competitividad. Datos extraídos de, MARTÍN ACEÑA, Pablo y MORENO, Begoña, “Miguel Boyer Salvador” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, *op.cit.*, pp. 205-227; Declaraciones de Miguel Boyer a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, pp. 287-310; GUTIÉRREZ SUÁREZ, José Luis, *Miguel Boyer, el...*, *op.cit.*; y, FERNÁNDEZ LOMMEN, Yolanda y ECHENAGUSIA, Javier, “Miguel Boyer”, *Economistas*, n° 72, (1996), pp. 74-80, entre otras referencias. Por lo demás, véase lo apuntado en el Capítulo 2, *nota 468*.

³⁴ Carlos Solchaga Catalán (Tafalla, Navarra, 1944). Licenciado y Doctoren Económicas y Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, pronto recalaría bajo la órbita de Luis Ángel Rojo [ROJO, Luis Ángel, *Keynes, su tiempo y el nuestro*, Madrid, Alianza, 1984; id. *Ensayos de economía y pensamiento político*, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2004]. A pesar de sus primeras aproximaciones al mundo keynesiano, sus posteriores estancias en Cambridge y en el MIT de Massachusetts (1970-1971) irían modificando sus primeros postulados económicos. Sus lecturas keynesianas serán sustituidas por las de Milton Friedman y Anna J. Schwartz. Vinculado desde muy pronto al Servicio de Estudios del Banco de España, con algún que otro paso por el INI, entraría en el PSOE de la mano de Miguel Boyer. Alejado de los debates sobre el marxismo compatibilizaría su militancia con trabajos en el mundo financiero –por ejemplo llegaría a ser Director General del Banco Vizcaya–. Conocido como gran orador, su entrada definitiva en política se produciría en 1980 cuando tras la dimisión de José Antonio Aguiriano que se había presentado como número uno por Álava por el PSOE, llegaría al Congreso de los Diputados. Tras su salida del gobierno en 1993 pasaría a ser portavoz del Grupo Socialista hasta 1996 cuando abandonaría la política profesional. A partir de ahí, y tras publicar sus memorias [SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, *op.cit.*] trabajaría en grandes corporaciones económicas. Así pues, por ejemplo, sería el Presidente de Estructura del Grupo PRISA (2000-2004) Datos extraídos de, RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “Carlos Solchaga Catalán” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, *op.cit.*, pp. 229-262; Declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, pp. 145-172; TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*; SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, *op.cit.*; MOTA, Jesús, “Entrevista con Carlos Solchaga” en JULIÁ, Santos, PADRERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la...*, *op.cit.*, pp. 564-568.

³⁵ La justificación de la elección de Miguel Boyer como Ministro de Economía para Felipe González no estuvo en momento alguno condicionada, según su testimonio, de cara a acceder y mejorar las relaciones con los poderes fácticos. Lo que en su día llamaría Nicolás Redondo el ‘abrazo aristocrático’. Para Felipe González la situación fue bien distinta: «Me había decidido por Miguel Boyer como ministro de Economía porque me merecía no sólo confianza desde un punto de vista personal, por su capacidad, sino porque sabía –y me parece que es un factor aún más determinante que el anterior– que él era poco discutible, que proyecta una imagen, como diría Paco Fernández Ordóñez, de ‘sabio atómico’, de que sabía lo que decía y lo que quería. Esa imagen se proyectaba hacia la ciudadanía, gustara o no gustara lo que decía el ministro. Boyer, en ese sentido era un factor de confianza poco discutible en

De cualquier de la formas se debe dar un paso de cara a interpretar, en términos históricos, aquella decisión política que también vinculaba a Carlos Solchaga. Veamos. Tras una de las muchas reincorporaciones de Miguel Boyer a las filas socialistas a mediados de los setenta, el mismo Felipe González se fijaría en aquel desconocido economista que ya *apuntaba maneras*. Moderado, pragmático y con una visión de un proyecto económico que conectaba con los presupuestos del que fuera secretario general socialista, más allá de lo que se aprobaba o no se aprobaba en los congresos socialistas, comenzaría a formar parte de lo que se ha conocido como el “gobierno en la sombra” —o a título oficioso bajo la denominación de “gabinete técnico” de la CEF del PSOE³⁶— del propio González³⁷.

aquella coyuntura». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 815. Por cierto aquella acertada expresión metafórica de *sabio* se ha convertido en uno de los más repetidos lugares comunes de este tiempo histórico. Para salir de estos mismos espacios consabidos nada mejor que acompañar a las citadas declaraciones de otras tiempo después por parte del propio interesado. Así en pleno agosto de 1985, tras regresar de unas vacaciones en el *Azor* y una vez cerrada la salida del propio Boyer, en una reunión con periodistas en lo que se conocía como ‘la bodeguilla’, copa y puro en mano, González Márquez afirmaría: «Miguel parece un sabio y no es para tanto. Es como un jugador de mus que quiere ganar la partida con ordagos. Solchaga es un jugador del ‘tran-tran’, un corredor de fondo, es un animal político y siempre va a estar ahí, porque lleva la vocación en la sangre y, gobierno quien gobierne, seguirá en política». Testimonio procedente de, GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, *op.cit.*, p. 276. Por su parte el mismo Miguel Boyer diría de Felipe González lo siguiente: Y era una gran suerte para el país y para el PSOE —sin precedentes en la agitada historia de éste— que un dirigente tan popular entre las bases y con tanto ascendiente sobre la organización fuera, al mismo tiempo, un político de orientación moderada y con buen instinto para los problemas económicos». “El segundo ajuste económico de la democracia española (diciembre de 1982-julio de 1985)” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, *op.cit.*, vol. VIII.

³⁶ Sobre la configuración de este ‘gabinete técnico’ y sus funciones véase: AHFFLC, Fondo Saracibar, PSOE-CE, “Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal”, Madrid, 15 de octubre de 1978, p. 38, sig. 002664-006. Y más concretamente véase Capítulo 4, *nota 162* y siguientes.

³⁷ Existe una gran cuestión todavía por resolver, y en donde la falta de testimonios y de documentación no permite avanzar más que a nivel de hipótesis de trabajo: ¿hasta qué punto Miguel Boyer sería determinante, a través de su influencia personal en Felipe González, en la toma del rumbo definitivo de las políticas del primer gobierno socialista en el ámbito económico? Ahora bien, a pesar de la falta de no pocos documentos que nos pudieran facilitar la tarea así como que los testimonios personales disponibles se han limitado a vagas referencias sobre este hecho, no han faltado quienes hayan dado su opinión antes que una interpretación plausible: «Sería absurdo mantener que Boyer, que para entonces había abandonado hacía tiempo su radicalismo juvenil, ejerce una influencia determinante sobre Felipe González y le inicia por la senda del pragmatismo y la moderación. El futuro presidente de Gobierno se apoya en Boyer porque, consciente o inconscientemente, había de antemano elegido la vía socialdemócrata; Boyer dio argumentos y seguridad a una convicción que ya tenía. Pero sí creo que de no haber conocido a Boyer la maduración política de González, lo cual equivale a decir la maduración del socialismo renovado, hubiera sido un proceso mucho más lento». BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 290. Por otro lado, en el libro de Francisco Bustelo, el mismo político llegaría a afirmar: «[L]a gran inteligencia de Boyer fue convencer a González desde el principio mismo de que él era una persona competente en materia económica que estaba dispuesta a ser un incondicional [...] se produjo un *coup de foudre* entre ambos». BUSTELO, Francisco, *La izquierda imperfecta...*, *op.cit.*, p. 299. Por su parte Mariano Guindal ha mantenido similar tesis: «Boyer convenció a Felipe para que impusiera una política económica ortodoxa». GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, p. 201. Opinión compartida, punto por punto, por ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, *op.cit.*, p. 243. Por último, Alfonso S. Palomares ha apuntado desde el conocimiento cercano a los hechos: «Nadie dudaba de su inteligencia, de su exquisita brillantez, ni de su formación cultural y económica, ni de su brutal y despiadada capacidad dialéctica. Felipe tenía debilidad por él y confiaba en su implacable determinación de cirujano para corregir los males encallecidos de la economía española dentro de la ortodoxia de una sociedad de mercado». PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González...*, *op.cit.*, p. 249.

A partir de ahí, y siempre bajo la estrecha supervisión del futuro presidente del gobierno, se consolidaría un importante grupo de economistas del PSOE³⁸. Un pilar clave para llevar a cabo muchas de las decisiones consideradas impopulares o simplemente contrarias a los planteamientos socialistas en aquel tiempo³⁹. Con Boyer a la cabeza, junto con Carlos Solchaga quien tardaría en incorporarse a este grupo⁴⁰, se iría configurando el “ala derecha” económica del PSOE, por más que a la hora de auto-etiquetarse se prefiriera la coletilla de “socialdemócrata”, a secas, para evitar *roces* innecesarios⁴¹. Así mientras que la “escuela clásica”, proviniera o no de planteamientos keynesianos iba ocupando acomodo, aquel *gobierno* en la sombra provocaría enfrentamientos o recelos tanto en la UGT como con destacados miembros del PSOE cercanos a Alfonso Guerra. Pero no sólo, pues entre los mismos economistas socialistas las discrepancias, públicas o no, sobre la *necesidad de modernizar* a toda prisa el socialismo, provocaría algún que otro aislado debate –antes que un enfrentamiento– sobre la política económica inclusive antes de llegar a La Moncloa⁴².

³⁸ No fueron pocas sus contribuciones en las publicaciones del PSOE. Un ejemplo en extremo significativo serían los textos recogidos en, EQUIPO JAIME VERA, *La alternativa socialista...*, *op.cit.*, donde destacan las firmadas por, KINDELÁN, Juan Manuel, “Una política económica hacia el socialismo” (pp. 219-249); MARTÍNEZ PUJANA, Ana, “Reflexiones sobre una alternativa socialista a la economía española” (pp. 251-270); o, FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La reforma fiscal y la consolidación de la democracia” (pp. 371-392). Tiempo más adelante, en concreto a partir de 1983, se comenzarían a publicar entre ese año y el siguiente los *Cuadernos de Economía del PSOE* en donde participarían una amplia nómina de economistas socialistas así como de otros recién llegados a la *causa*.

³⁹ Muy significativo fueron los informes ‘favorables’ sobre los *Pactos de la Moncloa*. Véanse: AHFPI, PSOE-GRUPO DE ECONOMISTAS, “Análisis de los acuerdos económicos y políticos. 1ª parte. El acuerdo económico de la Moncloa: análisis y valoración”, Madrid, noviembre de 1977, sig. Fa 22, redactado por Plácido Fernández Viagas; y, AHFPI, PSOE, “Balance de los Acuerdos de la Moncloa”, Madrid, diciembre de 1978, sig. Fc 1327. Y sobre el ‘control’ de Felipe González sobre las actividades de este grupo de economistas, AHFFLC, Fondo Saracíbar, Carlos Solchaga, “Informe sobre la reunión del Grupo Federal de Economistas del PSOE, Madrid, 11 y 12 de marzo de 1978”, Bilbao, 22 de marzo de 1978, sig. 002265-005.

⁴⁰ «El líder socialista [Felipe González] puso los ojos en él a pesar de que no pertenecía al grupo de economistas que trabajaban asiduamente en el partido. En alguna de las reuniones que estos expertos en asuntos económicos mantuvieron con Felipe González y a las que asistió Solchaga, éste se declaró humildemente incapaz de hacer una exposición clara y convincente sobre la materia que se debatía. ‘Si tú no eres capaz de explicar el asunto no sé quién podría hacerlo’, le respondería alguna vez Felipe González, quien siempre apreció en él su vocación política, su formación técnica y su extraordinaria capacidad dialéctica». Como señalan Carmen Tomás e Ignacio Alonso su incorporación definitiva sería fruto de una serie de percances y hechos no esperados: «Poco tiempo después se producirá el quinto rebote de Carlos Solchaga: el principal asesor económico de Felipe González en la clandestinidad y en la oposición, Miguel Boyer, cae enfermo de hepatitis. A Carlos Solchaga [...] se le abre así la puerta de acceso directo al líder del partido. El navarro, que temporalmente ocupa el puesto de asesor que Miguel Boyer ostenta, no deja pasar la oportunidad y se trabaja bien al futuro presidente». TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, pp. 36 y 61-62, respectivamente.

⁴¹ Véase lo planteado por el propio, SOLCHAGA, Carlos, *El final de...*, *op.cit.*, pp. 18-19. Más adelante los técnicos socialistas que, precisamente, no navegaban al son de los ministros liberales se autodefinirían como *keynesianos reformados*. Al respecto, COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Recuperación económica y...”, *op.cit.*, p. 24.

⁴² Este fue el caso de la *ponencia económica alternativa* presentada por Carlos Solchaga en el XXIX Congreso del PSOE en 1981. Una ponencia económica como ya se dijo que encargada al grupo de economistas del PSOE sería primero presentada en una reunión de la CEF y luego trasladada a los documentos congresuales [véase, en concreto, AHFPI, PSOE, “Anexo al Acta del 29º Congreso [21-24 de octubre] [Resoluciones]. 4. Política socio-económica, sindicalismo y cooperativismo”, Madrid, 1981, sig. Fa 1305]. Por el contrario, la ponencia alternativa de Solchaga expondría un programa de «corte clásico, noventa folios en los que aconsejaba realizar una política monetaria ortodoxa, aplicar la moderación salarial, realizar el ajuste y liberalizar la economía». TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 63. A falta del documento en cuestión, este movimiento dentro de la

De aquel núcleo –un buen número de ellos auto-incluidos dentro del grupo “Alihiers”⁴³– saldrían importantes técnicos y gestores gubernamentales, a pesar de que la mayoría no participarían en la redacción del programa electoral que había recaído en Almunia y su equipo de confianza⁴⁴. Asimismo no puede obviarse que muchos de estos economistas, poco tiempo después, se reconvertirían a la “causa neoliberal”⁴⁵ –palabra *tabú* donde las haya dentro del universo del socialismo español⁴⁶– o directamente se encuadrarían en lo que un considerable número de expertos ha definido como el “socialismo liberal”⁴⁷. No puede obviarse como buena parte de los mismos procedían de la “élite universitaria y liberal”⁴⁸. Entre esta nómina pueden destacarse los siguientes sin posibilidad ni ánimo de exhaustividad: Miguel Muñiz⁴⁹, Ernest

organización pero fuera de lo acordado por el grupo de economistas, más allá del debate que se originó, muestra como incluso antes de la elaboración del programa electoral socialista, las tensiones ‘liberales’ era una constante dentro del seno del PSOE. Véase lo apuntado en el apartado “4.2.2.3. La programación moderada (1979-1981)”.

⁴³ Como ha recordado José M^a Marín Arce numerosos economistas socialistas integrados en este grupo tuvieron un destacado papel desde finales de los años setenta hasta principios de la década de los ochenta, a través de las páginas de *El Socialista*. En concreto, en lo que se refiere a las tomas de postura del PSOE sobre la política económica. MARÍN ARCE, José M^a, “Díez años de..., *op.cit.*”.

⁴⁴ «Un grupo de economistas del partido, del cual, según Miguel Boyer, fueron excluidos por el aparatado del partido, ‘casi todos los que luego fuimos protagonistas de la política económica del gobierno’, había realizado los trabajos preparatorios del programa electoral». MARTÍN ACEÑA, Pablo y MORENO, Begoña, “Miguel Boyer Salvador” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en..., op.cit.*, p. 214. Véase lo apuntado previamente en el Capítulo 4, *nota 469*.

⁴⁵ Sobre las tardías críticas de los propios socialistas al neoliberalismo –concepto que desde la dirigencia socialista en el poder político nunca se aceptaría para definir su política económica– véase, *Sistema*, n^o 145-146, (1998), quien prepararía y publicaría un interesante y extenso dossier monográfico, eso sí, dos años después del fin de la época socialista, y con un gobierno popular en claro ascenso. A destacar, entre otros artículos allí contenidos, GUERRA, Alfonso, “La crisis del neoliberalismo y las tareas del socialismo” (pp. 5-14); y el de, TEZANOS, José Félix, “Neoliberalismo, socialismo y democracia” (pp. 17-33).

⁴⁶ Como ha recordado, una vez más, Cándido: «los grandes economistas del PSOE (casi todos ellos o todos ellos de clase media alta) fueron atraídos por la ‘nueva política de la riqueza’, todos también muy inteligentes, incluso brillantes y en posesión de un pensamiento sistemático, como Miguel Boyer o Carlos Solchaga [...]. Ellos prepararon lo que venía ya dado por la inspiración de la sociedad civil y de la sociedad política. No había otro cambio que éste: se había impuesto un género de realismo que prosperó en la medida en que el realismo de las ideas había dejado de existir o había perdido el sentido como tal realismo [...]. Más que una realineación ideológica de PSOE hubo un movimiento hacia la derecha, interpretado como un movimiento hacia la economía». CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de..., op.cit.*, p. 126

⁴⁷ CLARET, Andreu, “¿Hacia dónde va el Gobierno PSOE?” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista..., op.cit.*, p. 53. Con todo, no ha faltado quien haya calificado a este grupo de economistas como de «tendencia socialdemócrata». Por ejemplo, FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura..., op.cit.*, p. 39.

⁴⁸ CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de..., op.cit.*, p. 127.

⁴⁹ Miguel Muñiz (Ourense, 1943). Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, pasaría a engrosar las filas socialistas en 1975. Unos años antes, en concreto en 1966, entraría en el Instituto Nacional de Estadística en donde se curtiría en los mecanismos metodológicos de la Contabilidad Nacional. A partir de ahí llegaría a ser el director del Servicio de Estudios de la Compañía Telefónica Nacional de España y más tarde sería profesor de Teoría Económica y Contabilidad Nacional en la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo fue uno de los fundadores de la revista *Cambio 16*. Antes de la victoria del PSOE en octubre de 1982 estaría tras la preparación del nuevo *rumbo de la política económica*, que se llevara a cabo en el seno de las filas socialistas entre el XXVIII al XXIX congresos del PSOE. Una vez ya conformado el primer gobierno socialista sería

Lluch⁵⁰, Plácido Fernández Viagas⁵¹, Joaquín Leguina⁵², Julián Campo⁵³, Luis Carlos Croissier⁵⁴, Enrique Barón⁵⁵, Juan Muñoz⁵⁶, Francisco Fernández Marugán⁵⁷, Baltasar

nombrado en diciembre de 1982, Secretario General de Economía y Planificación del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, donde realmente tendría una presencia más significativa dentro del organigrama administrativo económico sería como director del Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde 1986 a 1996. Posteriormente ocuparía, entre otros importantes cargos, el puesto de Consejero de Caja Madrid. Es autor de numerosos e importantes artículos. Especialmente interesantes resultan los publicados a principios de los años ochenta, de cara a comprender la transformación programática del socialismo español. Entre otros textos deben destacarse: MUÑIZ, Miguel, “La estrategia económica...”, *op.cit.*; id., “Opciones de política económica” en *Sistema*, nº 80-81, (1987), pp. 101-110. Véase también la *nota 81*.

⁵⁰ Ernest Lluch (Vilassar del Mar, Barcelona – Barcelona, 1939-2000). Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, sería el primer Ministro de Sanidad y Consumo de los gobiernos socialistas (1982-1986). Un hombre procedente del Círculo de Empresarios y quien siempre estaría dentro del ‘Círculo de Claudio Boada’ [Noticia, “Cantera de ministros y altos cargos del Estado y las finanzas”, *El País*, 3 de julio de 1983]. Retirado de la primera escena política se dedicaría a la vida académica hasta su asesinato por ETA en noviembre de 2000. Véase, LLUCH, Ernest, *Últimos escritos*, Barcelona, Base, 2005, con prólogo de Lluís Maria de Puig.

⁵¹ Plácido Fernández Viagas (Tánger, 1942-Sevilla, 1983). Militante de Justicia Democrática y de Coordinación Democrática de Andalucía, sería profesor de Derecho en la Universidad de Sevilla. Elegido senador por la circunscripción de Sevilla en las elecciones de 1977, un año después sería investido presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía un 27 de mayo de 1978. Véase: FERNÁNDEZ VIAGAS, Plácido, *La Constitución de la Monarquía Parlamentaria*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

⁵² Joaquín Leguina (Villanueva de Villaescusa, Cantabria, 1941). Quien llegaría a ser el primer Presidente autonómico de la Comunidad de Madrid (1983-1995), se licenció en Ciencias Económicas por la hoy Universidad del País Vasco. Más tarde se doctoraría en la Universidad Complutense de Madrid tanto en Ciencias Económicas como en Demografía. Funcionario del Estado como Facultativo del Instituto Nacional de Estadística desde 1967, también pasaría por la Universidad Complutense de Madrid como profesor. Contratado en 1973 por la CEPAL para realizar un estudio en Chile, viviría el golpe de Estado de Augusto Pinochet en primera persona [véase, entre otras aportaciones, LEGUINA, Joaquín, *El Chile de la Unidad Popular (1970-1973)*, Córdoba, Ateneo de Córdoba, 1999] lo que le marcaría su posterior trayecto político. Militante, primero, de Convergencia Socialista de Madrid finalmente se afiliaría al PSOE en 1977. A partir de ese momento su carrera política se aceleraría: tras obtener el acta de concejal por el Ayuntamiento de Madrid en 1979, con el primer gobierno de Enrique Tierno Galván sería Delegado de Hacienda. En aquel año en el congreso de la Federación madrileña socialista se auparía tras un no fácil proceso con la Secretaria General. Diputado por las Cortes Generales en 1982, al año siguiente ganaría las elecciones de la recién creada Comunidad de Madrid. Hombre de aparato opuesto a los *guerristas* protagonizaría sonadas batallas en la federación madrileña como en la organización federal. Autor de numerosas obras y artículos, jugaría también un papel clave en la moderación de los socialistas a través del grupo de economistas del PSOE. Entre otras aportaciones: LEGUINA, Joaquín, *Conocer gente: recuerdos «casi» políticos*, Madrid, Aguilar, 2005.

⁵³ Julián Campo (Guecho, Vizcaya, 1938). Licenciado en Ciencias Económicas y en Ingeniería Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, tras un concurso-oposición pasaría a formar parte de Cuerpo de Funcionarios como Inspector de Finanzas del Ministerio de Economía y Hacienda. Posteriormente sería nombrado director de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria del Ministerio de Hacienda, entre otros relevantes cargos tanto en España como en el extranjero. Militante del PSOE desde 1974, y consumado experto en temas de macroeconomía, se convertiría en uno de los pilares del grupo de economistas del PSOE, encargándose de redactar el programa electoral del PSOE en 1982 en relación con el sector público. Nombrado Ministro de Obras Públicas y Urbanismo en el primer Gobierno socialista, saldría tras la primera crisis dentro del Consejo de Ministros. Diputado durante la III Legislatura, en octubre de 1986 es nombrado Consejero del Banco de España. Más tarde pasaría al mundo de la empresa privada así como sería presidente del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES). Antes de su jubilación volvería a Washington como consejero de la Embajada de España, donde ya antes había pasado dos años. Entre sus aportaciones muy relevantes de su posición económica véanse su colaboración en el siguiente trabajo colectivo: CAMPO, Julián, RUIZ LIGERO, Apolonio, ZABALZA, Antoni y ESCUDERO, Manuel, “El mercado: su papel en la crisis” en GUERRA, Alfonso CABALLERO, Abel y TEZANOS, José Félix (eds.), *La socialdemocracia ante...*, *op.cit.*, pp. 69-114.

⁵⁴ Luis Carlos Croissier (Aruca, 1950). Profesor de Política Económica en la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración Civil, ocuparía altos cargos en el Ministerio de Industria tras el triunfo socialista. Antes aquel militante socialista, estaría en el equipo de Almunia de cara a redactar el programa electoral de 1982, y así mismo sería uno de los redactores del programa económico [véase, Noticia, “Croissier fue coautor del programa socialista”, *El País*, 4 de octubre de 1984]. En 1984 sería nombrado presidente del INI entre 1984 a 1986. Después de la dimisión de Carlos Solchaga como Ministro de Industria, y tras el breve paso de Joan Majó (1985-1986) por dicha cartera, estaría de Industria desde 1986 a 1988. Posteriormente sería presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (1988-1996) e igualmente ocuparía diversos asientos de consejos de administración de importantes empresas multinacionales españolas (REPSOL, Adolfo Domínguez...). Entre sus aportaciones véanse, CROISSIER, Luis Carlos [et al.], *Economía y socialismo*, Madrid, Mañana Editorial, 1978; id., “INI: estrategia para recuperar rentabilidad”, *Economía Industrial*, n° 241, (1985), pp. 23-32; id., “Aquello duro seis años, 1982-1988”, *Dirección y progreso*, n° 185, (2002), pp. 19-24. Véase también la *nota* 81.

⁵⁵ Enrique Barón (Madrid, 1944). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid fue profesor de Estructura Económica en la citada universidad. Destacado dirigente socialista desde la dictadura franquista proveniente de Convergencia Socialista de Madrid y líder de la Federación de Partidos Socialistas, sería elegido diputado en las elecciones de 1977. Durante años se convertiría en el portavoz para asuntos económicos del Grupo Parlamentario Socialista. Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones entre 1982-1985, posteriormente desarrollaría su carrera política en el Parlamento Europeo en donde llegaría a presidir el mismo. Véase, BARÓN, Enrique, *Federación de Partidos Socialistas*, Barcelona, Avance, 1976.

⁵⁶ Juan Muñoz (Santa María la Real de Nieva, 1936 – Madrid, 2008). Economista que llegaría a ser Catedrático de Estructura Económica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, entre otros cargos académicos relevantes. Publicaría importantes obras así como colaboraría en numerosas revistas y con algunos de los más destacados académicos del país –entre otros con José Luis García Delgado y Santiago Roldán con quienes formarían el grupo periodístico “Arturo López Muñoz”. Seudónimo bajo el cual publicarían numerosos artículos en periódicos de la importancia de *El País*-. Colaborador habitual del grupo de economistas del PSOE, daría su salto a la política profesional en 1982 cuando sería elegido diputado tras la dimisión de Luis Solana, número 1 por Segovia, al aceptar su nombramiento como presidente de Telefónica. Hasta 1996 sería diputado llegando a ocupar la Vicepresidencia de la Cámara Baja. Posteriormente pasaría por diversos consejos de administración: Caja de Segovia, pero muy especialmente es recordado como Consejero del Banco de España. Como anteriormente se adelantó es autor de relevantes obras. Entre otras muchas relacionadas con este trabajo de investigación: MUÑOZ, Juan, *El poder de la banca*, Madrid, Zero, 1970; MUÑOZ, Juan y ROLDÁN, Santiago, “Liberalismo económico y..., *op.cit.*”; MUÑOZ, Juan y ROLDÁN, Santiago, “Estrategia económica y..., *op.cit.*”. Véase *nota* 81.

⁵⁷ Francisco Fernández Marugán (Cáceres, 1946). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores del Estado. Estamos ante uno de los grandes estrategas económicos del PSOE, eso sí, siempre cercano cuando no miembro destacado de la corriente ‘guerrista’ [El propio Guerra le describiría de la siguiente forma: «es una de las personas que una no deja de alegrarse de haber encontrado, laborioso, leal, honrado, inteligente y con una visión de la economía no siempre ortodoxa, porque incluye el factor humano en la planificación económica». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, *op.cit.*, p. 39]. A lo largo de los años combinaría altas responsabilidades en el interior del Partido como dentro del organigrama de la administración pública. Tras su no fácil paso por la Moncloa como Subdirector General del Gabinete de Presidencia (1982-1984) en donde le tocaría lidiar y enfrentarse constantemente al propio Miguel Boyer [sobre tales episodios, Noticia, Joaquín Prieto, “El discreto influjo de los «monclovitas»”, *El País*, 22 de julio de 1984, Noticia, Joaquín Prieto, “Los hombres clave”, *El País*, 22 de julio de 1984, en donde se hablaba de cómo se le había aplicado la Ley de Incompatibilidades, pero a pesar de todo se «se ha mantenido en el complejo de la Moncloa como asesor económico y es hombre de confianza de Alfonso Guerra, y en menor grado de Felipe González»] se encargaría de la Secretaría Federal de Política Económica de la CEF entre 1984 a 1987, mientras al mismo tiempo sería diputado socialista desde la II Legislatura hasta la actualidad. Aunque no ha ocupado cartera ministerial ninguna, está considerado como de una de las figuras más influyentes dentro de los gobiernos socialistas y del PSOE. A la sazón fue Secretario de Estado de Asuntos Económicos y Sociales desde 1993 a 1996 y asimismo coordinaría las campañas electorales de 1986 y 1993 bajo la tutela de Alfonso Guerra frente al equipo de José M^a Maravall, entre otros muchos cargos siempre en esa doble *dualidad* citada. Finalmente, el citado

Aymerich⁵⁸, Miguel Ángel Fernández Ordóñez⁵⁹, Luis de Velasco⁶⁰, Juan Manuel Kindelán⁶¹, Julio Rodríguez, Pedro Sancho, B. Lozano....

De esta forma, serían los auto-considerados economistas del “ala-derecha” del PSOE, quienes se encargarían de *pilotar* las principales reformas del proyecto modernizador socialista. Primero Miguel Boyer desde 1982 a 1985 al frente del Ministerio de Economía –conocido entre

economista ha sido un prolífico articulista: FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La construcción de..., *op.cit.*”; COLLADO, Juan Carlos y id., “Recuperación económica y..., *op.cit.*”; y, id. “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, pp. 135-194. Véase asimismo su testimonio, en declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, pp. 935-ss. Por último, nos remitimos a lo apuntado en el apartado “2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: entre la historia oficial/militante y la literatura partidista y otros materiales de estudio”.

⁵⁸ Baltasar Aymerich (Barcelona, 1943). Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona, comenzaría a militar en el PSOE en 1975 en donde destacaría también en el grupo de economistas, ocupando por lo demás diversos cargos en la organización de Madrid. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid dará el paso a la vida política profesional tras las elecciones municipales de 1979. En 1982 con la llegada de los socialistas al Gobierno es nombrado Director General de Obras Públicas. A partir de ahí pasaría a ocupar numerosos cargos tanto en el sector público como privado: Presidente de SINTEL, Consejo Delegado de Caja Postal en donde llegaría a ser el presidente de su corporación financiera; y asimismo estaría en otros tantos consejos de administración: Caja Madrid, Telefónica, Unión Fenosa o OHL.

⁵⁹ Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Madrid, 1945). El ex-Gobernador del Banco de España es licenciado en Ciencias Económica y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Cuerpo de Funcionarios de la Administración Pública, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Militante del PSOE desde los tiempos de la transición, tras su paso previo por Convergencia Socialista Madrileña, siempre se posicionó en los entornos más liberales del socialismo español. Autor de numerosos artículos en revistas académicas defendería, inclusive en tiempos de un PSOE *socialdemócrata*, posiciones cercanas al libre mercado. Con el triunfo electoral de 1982 sería nombrado, primero, secretario de Estado de Economía y más tarde Secretario de Comercio. Asimismo pasaría por el FMI y ocuparía entre otros cargos la presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia o la actual Comisión Nacional de Energía. Como otros tantos socialistas liberales recalaría en su momento en el Grupo PRISA. El que fuera hermano del también político socialista Francisco Fernández Ordóñez es autor de relevantes textos, que ejemplifican la profunda metamorfosis de la estrategia económica socialista. Asimismo participaría intensamente en el grupo de economistas del PSOE: FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Miguel Ángel, “La democracia necesita..., *op.cit.*”; id., “Sobre la política económica, los sindicatos y la incorporación de la mujer al trabajo”, *Sistema*, n^o 80-81, (1987), pp. 145-156; id., “Privatización, desregulación y liberalización de los mercados” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, pp. 661-682. Véase también la *nota 81*.

⁶⁰ Luis de Velasco (Madrid, 1939). Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho, a través de un concurso-oposición sería nombrado Técnico Comercial del Estado. Militante del PSOE desde 1976, llegaría a ser Secretario de Estado de Comercio. Cargo que ocuparía durante toda la primera legislatura del Ejecutivo socialista siendo posteriormente elegido diputado. En 1989 se reincorpora a su puesto de funcionario y en 1994 abandonaría el PSOE. El hoy militante de la formación nacionalista UPD –de hecho es diputado en la actualidad en la Asamblea de Madrid– ha colaborado en diversos medios de comunicación (*Diario 16*, *El Independiente*...). Miembro colaborador del grupo de economistas del PSOE durante la transición, tras su distanciamiento con los socialistas publicaría un contundente y duro libro en donde se criticaría la deriva económica seguida por el socialismo español como en pocos otros relatos procedentes del interior de las filas socialistas: VELASCO, Luis, *Política del PSOE...*, *op.cit.*. Véase también la *nota 81*.

⁶¹ Juan Manuel Kindelán (Santa Cruz de Tenerife, 1946 – Madrid, 2012). Doctor Ingeniero en Minas, ocuparía desde muy joven sucesivos cargos en el Ministerio de Industria y Energía. De hecho, con la llegada del Gobierno socialista sería nombrado con tan sólo 32 años Subsecretario de Industria. Posteriormente fue elegido presidente del Consejo Nuclear de Seguridad y de ENRESA. Véase también la *nota 81*.

los suyos como el “superministro”⁶² – y posteriormente Carlos Solchaga hasta 1993. Por más que la salida del primero se produjera a los dos años y medio –de hecho, sería el Ministro de Economía que menos tiempo estuvo al frente de tal cartera durante los gobiernos socialistas– la continuidad en política económica se mantendría –sin mayores alteraciones– durante este periodo.

La trayectoria biográfica tanto de Miguel Boyer como de Carlos Solchaga, en este sentido, es muy reveladora de la orientación “liberal” de ambos economistas. A pesar de compartir el mismo itinerario académico-profesional –como a continuación se detalla– sería Miguel Boyer quien influiría notablemente en el *giro* político-económico de Solchaga desde su inicial y juvenil trotskismo⁶³. Ambos provenían del Servicio de Estudios del Banco de España⁶⁴ así como coinciden en el Departamento de Economía Aplicada de la Cátedra de Pedro Schwartz⁶⁵. Su formación como economistas estaría rodeada de personajes de la importancia en aquellos años como Mariano Rubio⁶⁶, Francisco Fernández Ordóñez⁶⁷ o Fernando Baeza. Un punto de reunión clave será la revista *España Económica y Financiera* dirigida por Rogelio de Madariaga⁶⁸. Su procedencia, desde antes de la instauración de la democracia de los mismos

⁶² LLUCH, Ernest, “Recuperar el pasado, alcanzar Europa” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, *op.cit.*, p. 37.

⁶³ El relato nuevamente de Carmen Tomás y Ignacio Alonso es relevante en términos históricos: «La cercanía a Miguel Boyer, militante y activista del PSOE [...] hace que Carlos Solchaga modifique su pensamiento [...]. Miguel Boyer le agarra de la mano y le afilia al PSOE y a la UGT. Corre el año 1974 y, cosas de la vida, sus primeras tareas en el Partido Socialista serían de asesoramiento al sindicato [...]. Por fin, como dijera a Miguel Boyer cuando ingresó en el PSOE, podía acometer las reformas que, desde el trotskismo que abrazó en su juventud, le habían estado vetadas». TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, pp. 49-50. Una influencia trotskista proveniente de su compañero en el Servicio de Estudios del Banco de España, Jesús Albarracín.

⁶⁴ Sobre su importancia en el mundo empresarial, en el mundo gubernamental, en el mundo académico... MARTÍN ACEÑA, Pablo, *El Servicio de...*, *op.cit.*. Y no deje de leerse aquí, de forma atenta, la lectura ‘oficial/institucional’ de la reciente historia económica del país por la propia entidad en, SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA (ed.), *El análisis de la economía española*, Madrid, Alianza, 2005.

⁶⁵ Véanse, SCHWARTZ, Pedro, *Empresa y libertad*, Madrid, Unión Editorial, 1981; y, id. *Nuevos ensayos liberales*, Madrid, Espasa-Calpe, 1998, con prólogo de Mario Vargas Llosa. Sobre su papel e influencia académica y política en personajes tan alejados en materia económica como Boyer o Solchaga hasta el propio Francisco Fernández Marugán, junto con su frustrada carrera política de la mano de AP y Fraga, véase, GUTIÉRREZ, José Luis, *Miguel Boyer, el...*, *op.cit.*, pp. 23-ss. ,

⁶⁶ RUBIO, Mariano, *Mis memorias. Testimonio de una vida truncada por el “Caso Matesa”*, Barcelona, Plaza & Janés, 1991. Sobre su influencia y protagonismo en los *planes de estabilización* véase, FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, “Mariano Rubio Navarro, artífice de los planes de estabilización” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, *op.cit.*, pp. 53-90. Y asimismo el más que recomendable libro de, RIVASÉS, Jesús, *Mariano Rubio...*, *op.cit.*.

⁶⁷ Remitimos a Capítulo 4, *nota* 467.

⁶⁸ El juicio, de nuevo, de Carlos Rodríguez Braun –liberal antes que economista, quien recuperaría la citada publicación tiempo más tarde en formato mensual a través del Grupo 16– es altamente significativo de la importancia que tendría esta siempre citada revista: «Un símbolo de esta coincidencia fue la revista *España Económica*, que un grupo de economistas opositores al régimen franquista refundó en 1968, y desde la que se lanzó un mensaje innovador que fue a la postre demasiado duro para el régimen, que cerró la revista a comienzos de 1971 [...]. Los hombres de la *España Económica* del tardofranquismo, a los que los vientos de la política separaron después, fueron los inspiradores y ejecutores de la política económica de la España democrática, tanto de la UCD como del PSOE. Una apretada selección de los colaboradores habla por sí misma: Miguel Boyer, Carlos Bustelo, Juan Antonio García Díez, Luis Ángel Rojo, Mariano Rubio, Carlos Solchaga. Y la lista completa abarca a casi la totalidad de quienes han tenido algo que decir en la política posterior a Franco». RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “De la agonía a la agonía” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, *op.cit.*, 54. Tanto o más relevante que el anterior testimonio, lo fue el proporcionado en su

centros de poder, aseguraría por consiguiente una política de ajuste dentro de las principales líneas de actuación seguidas desde la firma de los Pactos de la Moncloa.

A poco que se indague se puede afirmar que existe una clara conexión no tanto en las formas pero sí en los contenidos con la escuela económica franquista más “liberal”⁶⁹, por no mencionar la propia procedencia de los ministros económicos de la UCD y su relación con los propios socialistas⁷⁰. Vinculados, antes y después de sus cargos gubernamentales, a los grandes centros de poder económico, nacional e internacional, sus sucesivas elecciones por el Presidente del Gobierno se constituiría en el más evidente signo de la preponderancia de una política económica de claro corte clásico⁷¹.

día por el periodista José Luis Gutiérrez, tanto acerca tanto del propio devenir de la revista como de todos aquellos que por allí pasaron, junto sus perfiles biográficos, políticos y académicos. Precisamente en su conocida obra, *Miguel Boyer, el hombre que sabía demasiado* dedica su capítulo “6. Los *beautiful* y el pensamiento burocrático” a examinar el *mundo* profesional y político-académico en donde se formaría un joven todavía Boyer entre finales de los sesenta y los setenta. Así tras describir toda la historia en torno a la propia revista *España Económica* afirmaría, entre otras tantas cuestiones de relieve, lo siguiente: «Al transcurrir el tiempo, con la democracia ya instalada en España, han sido los economistas de *España Económica* los que han dirigido la política económica del país, en torno a las ideas de política monetaria ortodoxa, inflación cero, competitividad internacional, libre sindicación, desaparición de pérdidas en la empresa pública, economía agraria sin proteccionismo; líneas de política económica que han inspirado básicamente a los gobiernos de UCD y del PSOE [...]. La revista constituyó, por tanto, todo un semillero de gobernantes para el futuro, con ideas modernas y europeas, inequívocamente demócratas todos ellos. Estaban vinculados a ella de una u otra forma Carlos Bustelo, Juan Manuel Kindelán, Ernest Lluch, Alberto Oliart, Víctor Pérez Díaz, Luis Ángel Rojo, José Luis Sampedro, Mariano Rubio, Raimundo Ortega, Miguel Boyer, Pedro Schwartz, Juan Antonio García Díez, Carlos Solchaga, Ignacio Fuejo, los hermanos Linde, Pedro Martínez Méndez, Pedro García Ferrero, Manuel Sánchez Ayuso, los técnicos comerciales del Estado Luis Martí y José Luis Ugarte, Armando Carabén, Serra Ramonedá y Jacinto Ros Hombravella, estos tres últimos desde Cataluña. Otros muchos, de distintas procedencias ideológicas, escribieron también en *España Económica*, como Eduardo Punset, Juan Muñoz o el propio Gabriel Tortella. Los futuros ministros económicos de UCD y del PSOE estaban casi todos en *EE*». GUTIÉRREZ, José Luis, *Miguel Boyer, el...*, *op.cit.*, pp. 55-56.

⁶⁹ De nuevo es de obligada lectura el trabajo de, GUERRERO, Diego, “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*. Véase aquí también: ROLDÁN, Santiago, MUÑOZ, Juan y SERRANO, Ángel, *¿Qué es el capitalismo español?* Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977; ETXEZARRETA, Miren, *La economía española...*, *op.cit.*; CARBALLO, Roberto, TEMPRANO, Antonio G. y MORAN SANTÍN, José Antonio (eds.), *Crecimiento económico y crisis estructural en España (1959-1980)*, Madrid, Akal, 1981; MARTÍNEZ-ALIER, Joan y ROCA, Jordi, “Economía política del...”, *op.cit.*; ROS HAMBRAVELLA, Jacinto, *La economía franquista*, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977. De especial interés es, ESTAPÉ, Fabián, *Sin acuse de recibo*, edición de sus *memorias* a cargo de Mónica TERRIBAS i SALA, Barcelona, Plaza & Janés, 2000.

⁷⁰ Al respecto Mercedes Cabrera y Fernando del Rey señalarían: «Los ministros económicos de UCD, desde Enrique Fuentes Quintana o Fernando Abril Martorell, a Francisco Fernández Ordóñez, Juan Antonio García Díez, Carlos Bustelo o Alberto Oliart, eran profesionales liberales, en bastantes casos con funciones de altos cuerpos de la Administración, algunos de los cuales habían pasado por organismos internacionales y habían contado con el apoyo de éstos en una larga lucha por la apertura y la liberalización de la economía española. Habían coincidido quizás en servicios de estudios de entidades públicas –el Banco de España o el INI– o privadas o habían sido, algunos, asesores o consejeros de bancos o empresas, pero no eran empresarios. Comulgaban todos con el objetivo de la modernización y necesaria europeización de la economía española...». CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, *op.cit.*, p. 342.

⁷¹ En no pocas ocasiones se ha llegado a decir que gracias a Boyer y Solchaga, el propio Felipe González entraría en contacto con la élite económica [véase aquí también la *nota* 35]. Una vía de entrada que siempre ha negado el propio interesado en múltiples ocasiones: «No es exacto que Miguel Boyer y Carlos Solchaga fueran, digamos, mis avales, que me recibieran en Madrid cuando yo era poco conocido. El entorno de acogida humana, la gente por la que me sentí acogido –algunos siendo muy amigos, como José Félix de Rivera–, no pertenecía exactamente al entorno de militancia del Partido. Tampoco tengo la

Pero además con demasiada frecuencia se ha omitido una cuestión de notable relevancia en relación a la conformación del primer gabinete socialista. Pues junto con el creciente poder que iría adquiriendo el *ala derecha* socialista y que se traduciría en no pocos nombramientos de altos cargos –sin poder obviar posteriores *purgas* o campañas de *cazas de brujas* de los disidentes keynesianos–; como decíamos ha pasado desapercibido como Miguel Boyer –con el apoyo o sin mayores disputas dentro del Consejo de Ministros⁷²– colocaría a “eminentes” empresarios en cargos de alta responsabilidad en las entonces existentes empresas públicas. Ejecutivos, principalmente, provenientes del “Círculo de Empresarios”⁷³. Personas vinculadas no sólo con las posiciones más conservadoras en aquellos momentos, sino colaboradoras en primera persona del régimen de Franco que conservaban a la altura de 1982 un alto poder político y económico directo e indirecto. Y no es un ejemplo aislado.

Como se recogía en un reportaje de *El País*, Miguel Boyer justificaría estos nombramientos de la siguiente forma: “Sucedee, como es natural, que no conozco a todo el mundo en España [...] y entre los que conozco elijo a los más idóneos para el cargo”⁷⁴. Un argumento tantas veces repetidos que ha terminado por interpretarse –sin mayores críticas– como una muestra más de pragmatismo por parte de quien fuera Ministro de Economía. No obstante, que desde el Gobierno socialista se procediera a “fichar” a personajes relacionados con el “Círculo de Empresarios” por más que se quisiera presentar en su día como un *símbolo de normalidad* o como la *búsqueda* de “*independientes*”, para dirigir buena parte de las empresas, que le evitase [a Miguel Boyer] la tacha de sectarismo y le allegase la confianza de los sectores económicos tradicionales”⁷⁵, no dejaba de ser una muestra más –y para nada insignificante– ya no tanto de la política económica que se pensaba desarrollar, sino de los estrechos lazos con el pasado dictatorial y el propio equipo de los gobiernos socialistas. Que directivos como Claudio Boada Villalonga pudieran, en cierta manera, condicionar su nombramiento y el de otros tantos afines, se constituyó, antes que nada, en el más acabado de ejemplo de la continuidad en el

percepción, aunque sé que es un comentario recurrente, de que Boyer y Solchaga fueran, de alguna manera, las personas que me hubieran puesto en contacto o me hubieran introducido en los niveles de los poderes fácticos, de la llamada ‘aristocracia financiera’. En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 807.

⁷² «La vinculación de algunos de estos hombres al antiguo régimen, y su ideología política [...] le está costando [...] más de un disgusto con el otro *peso pesado* del Gobierno González Alfonso Guerra y con el ministro de Industria Carlos Solchaga». VIDAL-FOLCH, Xavier, “Yo, Claudio”, *El País*, 16 de enero de 1983.

⁷³ Entre otros: Claudio Boada Villalonga (Presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos); Enrique Moya (Presidente del Instituto Nacional de Industria), José María Amusátegui (Presidente de CAMPSA), José Luis Díaz Fernández (Presidente de Enpetrol), José María López Letona (Presidente del Banco de Madrid) o Mariano Rubio (Subgobernador del Banco de España), José Miguel Antónanzas (Presidente de SEAT), Manuel Azpillicueta (Butano)... Información extraída de, ESTEFANÍA, Joaquín, “El Círculo de Empresarios, «semillero» de altos cargos”, *El País*, 9 de enero de 1983; y, VIDAL-FOLCH, Xavier, “Yo, Claudio”, *El País*, 16 de enero de 1983. Y véase también, MISSÉ, Andreu, “El Círculo de Economía un influyente foro económico”, *El País*, 3 de julio de 1983. En ambos artículos-reportajes se retrata extraordinariamente bien la historia, objetivos y actuaciones del propio *Círculo de Empresarios*, dentro del entramado político-ideológico-económico del cuerpo empresarial en España, en donde habría que sumar tanto la CEOE como la Asociación para el Progreso.

⁷⁴ ESTEFANÍA, Joaquín, “El Círculo de Empresarios, «semillero» de altos cargos”, *El País*, 9 de enero de 1983

⁷⁵ VIDAL-FOLCH, Xavier, “Yo, Claudio”, *El País*, 16 de enero de 1983. Y como señalaba el mismo autor en la citada crónica: «Miguel Boyer no pensó en las alforjas de algunos de los banqueros más renovadores o en la cantera de Cámaras o en los nombres europeístas del Círculo de Economía de Barcelona. Urgido por la necesidad de distanciarse sin altercados de la patronal CEOE y temeroso de dar demasiada alternativa a jóvenes ejecutivos socialistas poco conocidos, prefirió pescar cargos en el Círculo de Empresarios [...] y concretamente en las aguadas del grupo Boada».

ámbito económico⁷⁶. Un pequeño capítulo de esta historia todavía por escribir, que refuerza más la hipótesis de la *no ruptura* con las políticas económicas provenientes tanto desde la dictadura como desde la transición.

De este modo, se iniciaba la que sería una política moderada –cuando no *conservadora*, como observara Pérez Díaz⁷⁷– en lo económico. La planificación tecnocrática de la economía del país sería una de sus características⁷⁸. Igualmente los sucesivos ministros de economía contarían con “plenos poderes” y una amplia autonomía. Incluyéndose de *facto* la omisión del *programa electoral*⁷⁹. O como destacará el propio Fuentes Quintana produciéndose la “divergencia entre el programa electoral [...] y las decisiones adoptadas”⁸⁰, por encima siempre del resto de los ministros⁸¹.

⁷⁶ Para la trayectoria profesional de quien fuera presidente del INI entre 1970 y 1974, véase nuevamente el texto de, VIDAL-FOLCH, Xavier, “Yo, Claudio”, *El País*, 16 de enero de 1983. Por otro lado el periodista Cándido trajo a colación la siguiente conversación con el propio Boada: «En una ocasión le pregunté a Claudio Boada qué había de verdad en aquello de que era el rector de la economía socialista, por cuando había apadrinado a sus economistas más valiosos. ‘No es así –me dijo–. Me pidieron consejo sobre personas competentes, y yo fui a buscarlos al Banco de España. Eran los mejores y no me fijé si eran o no socialistas’». CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, *op.cit.*, p. 126. Por cierto, aquel nombramiento desataría escasas críticas. Entre las excepciones: Noticia, “El partido comunista pregunta al Gobierno por la presencia del «equipo Boada» al frente de las empresas públicas”, *El País*, 18 de febrero de 1983.

⁷⁷ PÉREZ DÍAZ, Víctor, *España puesta a...*, *op.cit.*.

⁷⁸ «Y en la década de los 80 nadie mejor para realizar la *nueva política socialtecnocrática* que los cuadros superiores de economistas y técnicos del P.S.O.E., dada su mejor comprensión de las nuevas exigencias del desarrollo capitalista, su mayor formación y capacidad técnica así como su pragmática disponibilidad ideológica [...]. Preocupados ante todo por consolidarse en el Poder, respetuosos con los *poderes fácticos* y arrogantes y duros con las mismas masas que les habían elegido, pero que era precisamente su misión disciplinar, estos cuadros socialtecnocráticos del P.S.O.E. estaban, en realidad, en mejor predisposición para realizar la *política de la derecha económica*, que la propia derecha en condiciones de permisividad democrática que no se había atrevido a hacer». ORTÍ, Alfonso, “Transición postfranquista a..., *op.cit.*, p. 19.

⁷⁹ Joaquín Almunia nos ofrece una interesante visión del papel de Boyer en el Ministerio: «Respecto al peso de los distintos ministros en aquel primer Gobierno socialista de 1982, es verdad que Miguel Boyer tenía un papel muy importante. Así estaba diseñado por Felipe y así se había pactado con Boyer. Y, hasta su dimisión, en junio de 1985, Boyer mandaba mucho en el área económica, incluso [...] se pasaba por el Arco del Triunfo el programa electoral. Decía: ‘¡Bah!, eso es lo que dice el programa electoral, pero lo que tenemos que hacer es esto otro’. Y, naturalmente, había tensiones». En declaraciones a IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 156. Por su parte, Boyer como era de prever siempre ha negado la mayor: «Los supuestos básicos políticos parten del programa electoral del Partido, al que yo atribuyo una gran importancia. Porque se trata de un compromiso con los votantes, en plazos determinados y con precisión de líneas y actuaciones». Entrevista a Miguel Boyer en, PSOE, *Hacia el cambio...*, *op.cit.*, p. 119. El tema de la amplia autonomía de los ministros encargados de los asuntos económicos también ha sido reconocido por el ex-presidente del Gobierno [Felipe González, en declaraciones a IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 818]. Ahora bien como indicara quien llegara a ocupar la cartera de Economía: «una cosa era que González, Solchaga y yo lo tuviéramos claro y otra cosa era que había que argumentar este experimento de laboratorio con el conjunto del partido». Miguel Boyer en declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 304.

⁸⁰ FUENTES QUINTANA, Enrique, “La economía española desde la transición hasta el presente” en ANES, Gonzalo (ed.), *Historia económica de...*, *op.cit.*, p. 736.

⁸¹ La composición del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria en el primer Gobierno socialista es muy significativa de la precaución que se tuvo en la elección de sus técnicos principales. A continuación citamos algunos de los altos cargos de este ministerio muchos de los cuales se mantuvieron hasta el final de la ‘década del cambio’: Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Secretario de Estado de Economía y Planificación, 1982-1986; Secretario de Estado de la Comisión de Asuntos Económicos, 1982-1986; Secretario de Estado de Comercio, 1986-1988); Juan Francisco Martín Seco (Secretario

Recuérdese asimismo que el mismo Miguel Boyer a su llegada al Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio –tras refundirse los mismos con el “objetivo de facilitar la coordinación y la centralización de la toma de decisiones de política económica”⁸²– también ocuparía la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDAE)⁸³. El poder y la autonomía que llegarían a disfrutar durante los gobiernos socialistas los diferentes Ministros de Economía, le haría afirmar al propio Alfonso Guerra la que con el tiempo sería una de sus frases lapidarias: “Esto es un Gobierno de coalición entre el PSOE y el ministro de Economía”⁸⁴.

General de Hacienda, 1984-1987), José Víctor Sevilla Segura (Secretario de Estado de Hacienda, 1982-1984), Jesús Vicente Evangelio (Director de Gabinete); Miguel Muñoz de las Cuevas (Secretario General de Economía y Planificación, 1982-1986); Josep Borrell Fontelles (Secretario General del Presupuesto y Gasto Público, 1983-1984); Miguel Martín Fernández (Jefe Gabinete Técnico, Subsecretario de Economía, 1984-1986); Guillermo de la Dehesa (Secretario General de Comercio, 1982-1986, Secretario de Estado de Economía, 1986-1988); Luis López Ibáñez (Director General de Inspección Financiera y Tributaria, 1982-1984); Pedro Solbes (Secretaria General Técnica); Julián García Vargas (Presidente del Instituto de Crédito Oficial); Luis de Velasco (Secretario de Comercio, 1982-1986). Y en lo que respecta al Ministerio de Industria: Luis Carlos Croissier (Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, 1981-1984 y vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria), Óscar Fanjul (Secretario General Técnico del Ministerio de Industria y Energía, 1984-1985), Florencio Ornia (Director General de Innovación Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria y Energía, 1982-1986), María del Carmen Maestre (Directora General de Industria, 1982-1986), Juan Manuel Kindelán (Director General de Minas del Ministerio de Industria y Energía, 1982-1985), Martín Gallego Málaga (Secretario General de la Energía y Recursos Minerales), José Claudio Aranzadi (Jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Energía, 1982-1984) y Alfonso García Santa Cruz (Director General de Coordinación del Plan, 1982-1987). Así podríamos llegar hasta los más de cien altos cargos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria en el primer Gobierno socialista.

⁸² MARTÍN ACEÑA, Pablo y MORENO, Begoña, “Miguel Boyer Salvador” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en..., op.cit.*, p. 211. Sobre estructura, funciones y composición del organigrama del Ministerio de Economía, desde la transición a la democracia hasta el final de la época socialista, véanse en las siguientes normativas [se citan tan sólo las principales]: Real Decreto 1839/1977, de 23 de julio, *sobre Estructura Orgánica y funciones del Ministerio de Economía* [B.O.E. 26 de julio de 1977]; Orden, de 1 de septiembre de 1978, *por la que se estructuran determinados Órganos Centrales del Ministerio de Economía* [B.O.E. 9 de septiembre de 1978]; Real Decreto 3774/1982, de 23 de diciembre, *por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda Real* [B.O.E. 24 de diciembre de 1982]; Real Decreto 2335/1983, de 4 de agosto, *por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda Real* [B.O.E. 9 de septiembre de 1983]; Real Decreto 221/1984, de 8 de febrero, *por el que se modifica la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda Real* [B.O.E. 9 de febrero de 1984]; Real Decreto 2440/1986, de 26 de noviembre, *por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda Real* [B.O.E. 20 de noviembre de 1986]; Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, *por el que se estructura el Ministerio de Economía y Hacienda Real* [B.O.E. 21 de febrero de 1987]; Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, *de estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda* [B.O.E. 6 de agosto de 1988].

⁸³ MARTÍN ACEÑA, Pablo y MORENO, Begoña, “Miguel Boyer Salvador” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en..., op.cit.*, p. 211. Sobre el funcionamiento de este órgano clave dentro del organigrama de los ejecutivos socialistas, véase el sobresaliente trabajo de, HEYWOOD, Paul (ed.), *Politics and policy..., op.cit.*, y dentro de él el propio trabajo de Heywood, “Power Diffusion or Concentration? In Search of the Spanish Policy Process?” (pp. 114-ss). Y desde una perspectiva eminentemente normativa, GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier, *Estudios sobre el Gobierno*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2007. Junto con el trabajo de, BAR, Antonio, “Contenido y dinámica de la estructura gubernamental en España”, *Revista de Derecho Político*, nº 29, (1989), pp. 37-114.

⁸⁴ Mucho más explícito fue Felipe González: «Porque Boyer tenía lo mismo que tuvo Solchaga después, y lo mismo que tuvo Pedro Solbes más adelante: toda la autoridad delegada en el área económica con un mínimo de interferencias, como es natural. En todos los Gobiernos hay quien opina de manera diferente. Pero no tenía ningún problema de gestión económica. Ningún problema». En

La *tercera pata* de aquel primer gobierno la constituiría el Ministro de Trabajo y de la Seguridad Social, Joaquín Almunia⁸⁵. Como *segunda opción* el dirigente socialista –de perfil menos *liberal* pero tampoco cercano a las posiciones de Guerra o de la UGT, en tanto se había caracterizado por encabezar el “ala renovadora” socialista– tendría que hacerse cargo del que con el paso del tiempo se transformaría en uno de los ministerios claves del proyecto económico socialista.

Sin embargo, el primer nombre que figuró fue el de José Luis Corcuera por aquel tiempo encargado de la Secretaría de Acción Reivindicativa de la UGT. Propuesta a la que el propio Nicolás Redondo se opondría. Primero, por lo que siempre consideró no negociable: la autonomía sindical⁸⁶. Y segundo, en base a los acuerdos entre partido-sindicato, la UGT siempre mantuvo que ninguno de sus cuadros ocuparía, bajo ninguna circunstancia, esa cartera⁸⁷. Como

declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 819. El mismo político en esa misma entrevista unas páginas más adelante señalaría: «Recuerdo una frase de Olof Palme, en la época, que decía: ‘A los ministros de Economía no hay que darles todo lo que quieren, no hay que darles la razón siempre; sólo en el 90 por ciento de las ocasiones si tienes confianza en ellos’». *Ibíd.*, p. 834.

⁸⁵ Joaquín Almunia Amann (Bilbao, 1949). Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Deusto, ampliaría sus estudios en otras universidades como la de París o Harvard. Profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Alcalá de Henares recalaría con el paso del tiempo en la Oficina de las Cámaras de Comercio Españolas en Bruselas. Militante del PSOE y de la UGT compaginaría ambas militancias, aunque en una primera etapa sería uno de los más destacados economistas del sindicato. Posteriormente, y bajo la órbita de Felipe González, entraría en el núcleo duro del PSOE para hacerse cargo de la Secretaría de Relaciones Sindicales de la CEF del PSOE. Diputado desde 1979 se encargaría de coordinar los asuntos relacionados con el mercado laboral dentro del Grupo Parlamentario Socialista. Bajo los gobiernos socialistas no sólo sería Ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 1982-1986, sino que durante la segunda y buena parte de la tercera legislatura socialista ocuparía la cartera de Administraciones Públicas (1986-1991). A diferencia de los Ministros de Economía y de Industria tras su salida ministerial continuó su carrera política dentro del PSOE, tras una pequeña estancia en la Fundación Argentaria. De hecho, y tras la dimisión de Felipe González en el XXXIV Congreso socialista en 1997 alcanzaría la Secretaría General. Ahora bien, para sorpresa de la ciudadanía y concretamente de muchos militantes socialistas, saldría derrotado de las ‘primarias’ para elegir el candidato a la presidencia del gobierno frente a Josep Borrell. Una vez dimitido este último se enfrentaría finalmente contra el entonces Presidente del Gobierno, José M^a Aznar, en las elecciones generales del año 2000, en donde el PSOE obtendría tan sólo 125 diputados, y por tanto, aproximándose a los resultados de las elecciones de 1977 y 1979. Tras publicar sus aquí citadas memorias se retiraría de la política nacional pasando a ser el Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios tras la dimisión de Pedro Solbes. Actualmente es Vicepresidente y Comisario Europeo de Competencia. Datos extraídos de, ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*; *id.*, *Los puntos negros del PP*, Madrid, Aguilar, 2004; VALCÁRCEL, Amelia, “Entrevista con Joaquín Almunia”, *Leviatán*, n^o 69, (1997), pp. 5-34; SUÁREZ, Mariló, *Los secretos de...*, *op.cit.*, con prologo de Javier Solana; MARTÍN, Ricardo, *Almunia: un corredor...*, *op.cit.*.

⁸⁶ En concreto, véase una cerrada defensa de la autonomía sindical por parte de la UGT en la primera reunión de su máximo órgano de gobierno tras la victoria socialista: AHFFLC, UGT-CEC, “VII Comité Confederal. «Gestión de la Secretaría General»”, Madrid, 4 y 5 de diciembre de 1982, SIG. 002605-006, pp. 4-10.

⁸⁷ Como ha traído a *debate* las ‘memorias’ de Eduardo Sotillos –1982, *el año clave...*, *op.cit.*, véase especialmente “A modo de epílogo” (pp. 269-274)– se desliza allí la hipótesis de que en un principio Felipe González tenía por objeto que Nicolás Redondo fuera el Ministro de Trabajo. Extremo que nunca fue confirmado por el otro protagonista –resultaría así altamente significativo el silencio mantenido por el propio Redondo en diversas entrevistas como las de, GUINDAL, Mariano y SERRANO, Rodolfo, *La otra transición...*, *op.cit.*– ni por el que fuera Ministro de Trabajo –ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*, pp. 141–. Una hipótesis, en todo caso, desmentida a través de dos entrevistas realizadas por el autor de esta investigación: primero, con quien fuera Secretario de Organización de la UGT en aquellos años –José Antonio Saracibar, Madrid, 30 de marzo de 2006–; y segundo, con el asesor, primero, del sindicato socialista, y posteriormente de los Ministros de Trabajo, Manuel Chaves y Luis Martínez Noval –Armando Caro Figueroa, Buenos Aires, 14 de noviembre de 2006–. Ambos coincidieron en reafirmar la tesis de que Nicolás Redondo nunca fue invitado a formar parte del

ha recordado el mismo Almunia una vez que el futuro presidente del Gobierno le propone ocupar la cartera de trabajo, “Nicolás [Redondo] conocía la oferta que me estaba haciendo, y que estaba de acuerdo con ella”⁸⁸.

Un primer y desapercibido enfrentamiento que posteriormente tendría sus consecuencias a nivel organizativo y político entre el PSOE y UGT. Ahora bien, Corcuera, desde su privilegiada posición dentro del sindicato, se convertiría uno de los principales impulsores y defensores de la reconversión industrial y de las reformas laborales de los gobiernos socialistas, iniciándose una serie de enfrentamientos que, primero, le harían abandonar la Ejecutiva Confederal del sindicato en 1985 y tres años después sería nombrado Ministro de Interior tras suceder a José Barrionuevo⁸⁹. Mientras tanto, Joaquín Almunia –junto a

Gobierno, y lo que es más importante la negativa a que entrara Corcuera, sería ordenada por el propio Redondo quien obligó a firmar un *acuerdo secreto* a todos los dirigentes de la UGT de cara a rechazar tal Ministerio. Por otro lado, la posición con respecto a esta cuestión del propio Nicolás Redondo ha sido la siguiente: «Es que habíamos acordado en la Ejecutiva de la UGT que si el partido recababa a alguno de nuestra Ejecutiva para ministro estaríamos dispuestos a cualquier ministerio menos al de Trabajo. Lo acordamos porque ese ministerio era el más comprometido para el propio sindicato, puesto que podía haber una relación entre el ministro y el sindicato en función de medidas que tenían que ser duras dada esa crisis de que usted habla». En declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, pp. 209-210. Véase también sus declaraciones a, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, *op.cit.*, en donde sale a relucir el nombre de Zufiaur también como posible ministrable concluyendo: «Hasta ahora no ha sido posible un debate ordenado y autocrítico en el PSOE sobre lo que ocurrió entre el Gobierno y el Movimiento Sindical, particularmente no se ha producido un debate sobre la relación del PSOE con UGT en aquella época». *Ibíd.*, p. 105. Por último, la enésima versión la ha proporcionado Alfonso S. Palomares, quien da la vuelta a todo lo anterior: «En lo referente a José Luis Corcuera como candidato al Ministerio de Trabajo se ha mantenido una cierta ceremonia de la confusión alimentada por Nicolás Redondo. Los hechos fueron al revés de cómo suelen contarse. De cómo los contó Nicolás. Un mediodía de aquel noviembre [...] Felipe González llamó a José Luis Corcuera y le ofreció la cartera de Trabajo; a Corcuera, según sus palabras, le entró miedo escénico y otros temores más concretos que le fue exponiendo a Felipe como razones para rechazar el ofrecimiento. Nicolás Redondo no tenía idea, ni rumor ni sospecha de lo que estaba pasando. Terminada la reunión, Corcuera se fue a la sede de UGT en busca de Nicolás y al encontrarlo le contó lo que acaba de suceder. Nicolás pasó del desconcierto al cabreo. Consideró la propuesta de Felipe como una provocación traicionera [...]. Corcuera le dijo a Redondo que debía convocar una comisión ejecutiva de la UGT para que decidiera que los miembros de esa comisión no podrían pertenecer al gobierno. Esa resolución le permitiría dar un no definitivo a Felipe, si éste les seguía insistiendo con la oferta ministerial. Se reunieron y Nicolás expuso que Felipe quería para el Ministerio de Trabajo a un miembro de la comisión ejecutiva, pero en ningún momento pronunció el nombre de Corcuera y dejó entender que era una petición que Felipe le había hecho a él, a Nicolás. Allí se decidió que los miembros de la ejecutiva no fueran ministros, lo que satisfizo a Corcuera». PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González...*, *op.cit.*, p. 252. Aquí debe apuntarse que en ninguna de las actas de la CEC de UGT que se pueden consultar en este tiempo –en concreto, las del 16 de noviembre, el 30 de noviembre y el 20 de diciembre– aparece mención alguna relacionada con tales cuestiones. Esto no significa que lo anterior no sea cierto, pues como se ha podido comprobar en más de una ocasión ni están todas las actas y en otras ocasiones el *papel* correspondiente ha sido *traspapelado*. Las mismas se pueden localizar en, AHFFLC. UGT-CEC, “Libro de actas de reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 3.1.81”, sig. 002561-002.

⁸⁸ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*, p. 144.

⁸⁹ José Luis Corcuera (Pradoluengo, Burgos, 1945). Dirigente del metal de UGT dirigiría dentro del sindicato la Secretaría de Acción Reivindicativa hasta su dimisión en 1985 en pleno debate de la Ley de Pensiones, conservando su acta de diputado obtenida en 1982. Una dimisión que en su momento supuso un duro golpe para la ejecutiva del sindicato y especialmente para el propio Redondo que lo había considerado un posible ‘sucesor’. Miembro de la ejecutiva socialista fue designado con gran sorpresa en los medios de comunicación Ministro del Interior en 1988. Cargo que ocuparía hasta 1993. De hecho, ha sido considerado como el primer ‘ministro obrero’ de los socialistas. En todo caso, sería recordado para la posterioridad por impulsar la que se conocería como la “Ley Corcuera” [Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, de *protección de seguridad ciudadana* [B.O.E. 22 de febrero de 1992] y más concretamente por su implicación en el desvío de fondos reservados relacionados con el terrorismo de Estado de los GAL [sobre esta última cuestión véase, BARRIONUEVO, José, *2001 días en Interior*, Barcelona, Ediciones

su equipo⁹⁰ – que había coordinado la elaboración del *programa electoral*, una vez asumido que su intención de trabajar en el Gabinete de Moncloa no tenía visos de prosperar ante la presencia de Alfonso Guerra, estaría al frente del Ministerio de Trabajo durante aquella no fácil legislatura socialista⁹¹.

Por estos caminos aquí delineados, en breve, se pondría en marcha la elaboración y diseño del primer “Programa Económico a Medio Plazo 1983-1986”⁹². Un *programa* en donde mucho pesó la fracasada experiencia francesa de aquellos años –lo que a la postre tendría importantes “efectos pedagógicos internos”⁹³– y, sobre todo, los nuevos aires neoliberales que comenzaban a *soplar* en Gran Bretaña de la mano de Margaret Thatcher⁹⁴. El PSOE contaba con todos los requisitos necesarios para iniciar su programa de modernización, pero como ha

Grupo Zeta, 1997; y, especialmente, BELLOCH, Santiago, *Interior. Los hechos clave de la Seguridad del Estado en el último cuarto de siglo*, Barcelona, Ediciones B, 1998]. Véase, por último, CORCUERA, José Luis [et al.], “Nuevas políticas sectoriales ante la crisis económica” en GUERRA, Alfonso CABALLERO, Abel y TEZANOS, José Félix (eds.), *La socialdemocracia ante...*, *op.cit.*, pp. 137-174; y concretamente su testimonio, en declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, pp. 435-ss.

⁹⁰ Entre otros nombramientos: Segismundo Crespo (Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, 1982-1991), Luis García de Blas (Secretario General para la Seguridad Social con rango de Subsecretario de Estado, 1982-1986), Pedro Montero (Director General del INEM, 1982-1986), Francisco José García Zapata (Director General de Trabajo, 1982-1985), Carlos Navarro (Director General de Empleo, 1982-1985, Director General de Trabajo, 1985-1990), José Ignacio Pérez Infante (1985-1990) Bernardo Fernández Fernández (Director General del Instituto de Seguridad Social, 1982-1984), Carlos Solinis Laredo (Director General del Instituto de Seguridad Social, 1984-1987), Enrique Heras Poza (Director General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992-1996), Adolfo Jiménez Fernández (Director General del Régimen Económico de la Seguridad Social, 1982-1986, Secretario General de la Seguridad Social, 1986-1996), José Teófilo Serrano (Director del Gabinete Técnico, 1982-1986), María Teresa Iza Echave (Directora General de Emigración, 1982-1984), Raimundo Aragón Bombín (Director General de Emigración, 1984-1991), Enrique Heras Poza (Director General de Servicios, 1982-1996) y Álvaro Espina, (Secretario General Técnico, 1982-1985, Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, 1985-1991). De igual forma debe destacarse el papel que jugaría Alejandro Cercas, junto con el propio Álvaro Espina y Segismundo Crespo, en la preparación de este equipo ministerial así como en el traspaso de poderes con el equipo del Ministro Santiago Rodríguez-Miranda Gómez. Véase al respecto, ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*, pp. 145 y 149-150, respectivamente.

⁹¹ *Ibidem*, p. 144.

⁹² Nos remitimos aquí al apartado “6.2.1.1. Principios de realidad: el *Programa Económico a Medio Plazo*”.

⁹³ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 344. Véase lo apuntado en el Capítulo 4, nota 458 y nota 459.

⁹⁴ En pleno mes electoral Felipe González afirmaría que los socialistas habían aprendido más de los errores de Thatcher que de los de Mitterrand: «Hemos aprendido mucho más de los errores de la señora Thatcher. Yo de Francia he aprendido la lección de que en una campaña no pueden hacerse promesas excesivas y de que una sociedad (en este caso, la francesa) no tiene respuestas y los recursos para todos. Ahora los socialistas franceses se han encontrado con la dura realidad de que un país, con dependencia energética y dependencia económica internacionales, no se puede hacer una jornada de treinta y cinco horas si los demás países mantienen la de cuarenta. No se puede jugar en un entorno económico sólo nacional, sin tener en cuenta los factores internacionales porque después hay que rectificar». Declaraciones extraídas de, YÁÑEZ, Manuel, *El triunfo de una larga lucha: P.S.O.E.: historia de una transición, el partido más antiguo de Europa, un líder esperado*, Madrid, Gerra, 1982, p. 48. Por su parte Miguel Boyer destacaría: «[L]a orientación de la política económica fue más fácil de presentar de lo que podía parecer porque, en el fondo, el ejemplo francés, la situación delicada de la economía española, su balanza de pagos, la inflación y lo demás crearon un convencimiento en la gente que había que hacer un ajuste». En declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, pp. 303-304.

destacado nuevamente Enrique Fuentes Quintana –“padre del sempiterno ajuste desde 1959”⁹⁵– no deja de resultar curioso,

«que el fundamento para la prioridad de la política de ajuste por el Partido Socialista volvía a ser el asentamiento del orden democrático, que volvía a demandar, en 1982, la atribución de una prioridad política a la solución de los problemas económicos. Igualmente, tal y como se afirmaba en 1977, se repetía de nuevo en 1982»⁹⁶.

La III (1986-1989) y IV (1989-1993) legislaturas no van a representar cambios sustanciales en materia de política económica así como de tipo laboral. De hecho, la *orientación liberal* se intensificará en el último tramo de la IV Legislatura. El mantenimiento de los equipos económicos, más allá de los *cambios nominales* en determinadas carteras ministeriales así como en lo referente a los Secretarios de Estado y otros altos cargos de la administración, constituye la nota, en realidad, a destacar. Por otro lado, los resultados en las *urnas* y un apoyo social realmente contrastable reforzarían, a su medida, la legitimidad del camino emprendido.

La coyuntura política, económica y social a la que han de enfrentarse los gobiernos socialistas va a verse modificada gradualmente. De entrada, la inauguración de la segunda legislatura coincidirá con la apertura de un ciclo económico expansivo. Al mismo tiempo, la relativa, temporal y cauta “paz social” que había predominado desde la firma del AES, tras superarse, no sin costes, el *brutal* ciclo conflictivo entre 1983 a 1984, estallará, en breve, a través de nuevos y agudos conflictos sociales pero también obreros. A lo que se va añadir un progresivo desgaste político-institucional del Gobierno. Notas básicas para entender no pocas de las *entradas y salidas* en el Consejo de Ministros.

En la nueva composición del Gobierno socialista tras la segunda victoria electoral en 1986, no existieron cambios apreciables en las carteras de mayor gasto económico. Diez de los ministros que habían accedido al ejecutivo en el ochenta y dos repetían de un total de dieciséis. Así pues, los principales cambios en el Consejo de Ministros se producen antes y después del ochenta y seis, y vienen precedidos por dos crisis gubernamentales con un intervalo de tres años: la de julio de 1985 y la de julio de 1988⁹⁷. Como bien se puede observar, las mismas se acometerían en pleno periodo estival, tratando de minimizar el *impacto* político pero también mediático.

De este modo, cuando Felipe González anuncia el 25 de julio de 1986 la composición del Ejecutivo de la III Legislatura, la nota característica va a ser la continuidad tras la citada crisis gubernamental de un año antes. Una crisis a los dos años y medio de gobierno que sería mal gestionada, y en donde se “puso en evidencia una cierta torpeza por parte del presidente en su manejo”⁹⁸. El nodo central de la misma se fundamentaría, en gran medida, por el debate

⁹⁵ FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, p. 41.

⁹⁶ FUENTES QUINTANA, Enrique, “La economía como profesión: Una memoria personal” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 744. Del mismo autor véase, id., “La prioridad política de la economía en la transición española”, *Pensamiento Iberoamericano*, nº 3, (1983), pp. 118-127, dentro del dossier monográfico titulado, *Recesión, naturaleza y opciones*.

⁹⁷ Junto con los cambios que se enuncian páginas más adelante, los principales movimientos se producirían en las carteras de Justicia –Fernando Ledesma sería sustituido por Enrique Múgica– y en Interior –José Luis Corcuera entraba por José Barrionuevo– en ambos casos por el ‘queme’ de sus respectivos responsables tras más de seis años al frente. Y asimismo, Javier Solana pasaría a Educación mientras que Jorge Semprún a Cultura, lo que junto con el nombramiento de Rosa Conde como portavoz del Gobierno, y la creación del Ministerio de Asuntos Sociales con una *guerrista* confesa a su cargo, Matilde Fernández, constituyen las notas más destacas.

⁹⁸ SOTO CARMONA, Álvaro, “Una acción más reformista que socialdemócrata” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, p. 26.

abierto en el seno del equipo del Gobierno por la política económica seguida, hasta entonces, y que tiene a un gran protagonista: la dimisión de Miguel Boyer. Una dimisión, que junto con la de Alfonso Guerra unos años más tarde, es una de las “bajas” más sonadas de toda la época socialista. Y resulta de interés las causas y motivos que están tras tal acontecimiento para constatar una vez más la apuesta del propio González, con los necesarios ajustes internos realizados, por mantener el mismo rumbo en relación a la política de ajuste iniciada tres años antes.

No podemos limitarnos en este caso a lo que han contando los diversos testimonios socialistas, así como otros personajes relevantes y ni muchos a las crónicas periodísticas. Es así porque la mayor parte de estas fuentes secundarias han reducido la salida de Boyer a meras cuestiones de enfrentamiento personal y de ambición de poder⁹⁹. Dos poderosas razones que, ciertamente, estuvieron detrás de su dimisión. Sin embargo, debemos dar un paso más y observar las diversas ramificaciones de cada una de las razones argumentadas. Veamos. La primera razón, sin lugar a dudas, estaría en la petición de una vicepresidencia económica por parte de Miguel Boyer en 1985, de cara a reforzar su hasta entonces posición hegemónica dentro del Gabinete¹⁰⁰; la segunda, la necesidad de continuar y profundizar con la política de ajuste ortodoxo, que venía provocando no pocos enfrentamientos en el seno del Gobierno con Ministros como Maravall –quien saldría de Educación en 1988 tras una complicada y no siempre reconocida gestión– o Ernest Lluch¹⁰¹; y la tercera, y relacionada con ambas, el riesgo de un potencial enfrentamiento con Alfonso Guerra¹⁰². Y aquí entra un argumento de peso: la creación de una vicepresidencia económica hubiera supuesto que junto al control de la CDGAE

⁹⁹ Hipótesis que han sido reproducidas sin la debida constatación de fuentes en no pocos trabajos. Por ejemplo en, SOTO CARMONA, Álvaro, “Una acción más reformista que socialdemócrata” en *ibidem*.

¹⁰⁰ Véase primero, GUERRA, Alfonso, *Cuando el tiempo...*, *op.cit.*, pp. 186-ss.; y concretamente lo dicho por Felipe González: «Yo creo que él, en alguna medida, salió desairado del Gobierno. No asumió plenamente no haber consolidado sus ambiciones, su aspiración de ser vicepresidente [...]. Digamos que, esa crisis, Miguel pensó que podría condicionar mis propias decisiones como responsable del cambio de Gobierno». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, pp. 814-815; así como lo declarado por el propio interesado: «Creí que había que cambiar las reglas en el ámbito económico porque el juego de los demás ministros era enfrentarse con el ministro de Hacienda, que naturalmente intentaba apretarles siempre, e ir al arbitraje siempre del presidente del Gobierno. Esto tenía un desgaste tremendo y se llegaba a situaciones completamente absurdas. Decidí que había que dejar sentado que había que entenderse con el ministro de Economía y Hacienda y la manera simbólica de demostrar que este ministro tenía la última palabra en temas económicos era elevando el cargo al rango de vicepresidencia». En declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 306. Reflexiones que Boyer, por último, sintetizaría en una frase premonitrice de nueve palabras, que daría a *modo de advertencia* antes que de *consejo* a su amigo y su sucesor momentos antes de la toma de posesión de su nuevo cargo en el salón Carlos III del Ministerio de Economía un caluroso 5 de julio de 1985: «No podrás con Alfonso Guerra ni con Nicolás Redondo». GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, p. 275. Sobre su intenso papel en la primera legislatura socialista véase el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985”.

¹⁰¹ Véanse, en este sentido, Noticia, “Boyer exigió inicialmente la crisis a Felipe González para completar la política de ajuste económico”, *El País*, 6 de julio de 1985. Si damos verisimilitud a lo citado en la crónica ya en «una comida celebrada el 27 de junio de 1984 en la universidad Menéndez Pelayo» Boyer había avanzado «la inminencia y alcance de la remodelación del Gobierno». El motivo, «la necesidad de acometer la contención del déficit público, el tercero de los elementos básicos en el esquema que se había marcado para lograr la estabilización de la economía española». Véase asimismo el interesante relato que aportó, MORÁN, Fernando, *España en su sitio*, Barcelona, Plaza & Janés / Cambio 16, 1990, pp. 351-ss.

¹⁰² Consúltase el revelador testimonio de José María Maravall acerca de estos enfrentamientos en, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, pp. 52-ss.

también hubiera recaído en Boyer la presidencia del CGSES¹⁰³. En tal caso, el riesgo de una brecha, tanto en el Gobierno como en el Partido, por la vía enfrentamiento González/Boyer-Guerra hubiera sido muy alto. Un *precio* que no estaba dispuesto a pagar el propio González ni el Partido en ningún caso. A estas tres razones de enorme relevancia van a venir a sumarse otras tantas de tipo coyuntural: las elecciones legislativas del siguiente año; el horizonte posible del temido referéndum sobre la OTAN así como la necesidad de *afinar* la política económica de cara a la entrada en la CEE; y por último, reducir el desgaste político de un conjunto de ministros que habían llevado a cabo la parte más dura de la primera fase de la política de ajuste.

Así pues, será la posición defensiva-ofensiva de Boyer la que desata la primera crisis gubernamental socialista. Felipe González teniendo en cuenta estas variables termina sustituyendo a Boyer por Solchaga. Pero no sólo, por Solchaga como ya se ha dicho entra Joan Majó en Industria, político de máxima confianza tanto de Boyer como de Solchaga y que garantiza, en suma, la más estricta continuidad¹⁰⁴.

Pero la crisis no terminó ahí. El resto de los nuevos nombramientos –Exteriores, Obras Públicas y Urbanismo, Transportes, Administración Territorial y en la portavocía del Gobierno– son los resultados de un difícil equilibrio de poderes y contrapoderes con sus respectivas bifurcaciones dentro del *partido* para afrontar el resto de la legislatura¹⁰⁵. En lo que nos interesa, queda patente como si bien Boyer dejaba el Gobierno, por otro lado, buena parte de su equipo, con Solchaga en primera línea, permanecía en sus puestos en pleno ciclo de expansión de la economía española¹⁰⁶.

¹⁰³ Valoraciones de alcance al respecto de, RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en...*, *op.cit.*, p. 258-ss, en lo que denominada como ‘La crisis del equipo económico’.

¹⁰⁴ Joan Majó (Mataró, 1939). Doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña en Ingeniería Industrial. A nivel profesional llegaría a ser nombrado presidente del Consejo Español de Colegios de Ingenieros. Empresario iniciado en política en grupos de cristianos de bases se afiliaría posteriormente al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Allí comenzó su carrera profesional en política como Alcalde de su ciudad natal en las primeras elecciones legislativas. Después de tres años es requerido por el equipo de Solchaga para ser nombrado Director General de Electrónica e Informática del Ministerio de Industria. De ahí pasará a ocupar durante apenas un año el Ministerio de Industria. Firmemente partidario de la reconversión industrial y relacionado con el mundo empresarial y financiero su candidatura enlazaba con la política hasta entonces seguida. Posteriormente continuaría su carrera en el ámbito de la empresa compaginando esta actividad con otros cargos políticos. Entre otros, llegaría a ser director de la Corporación Catalana de Radio y Televisión.

¹⁰⁵ Fernando Morán sería sustituido por Francisco Fernández Ordóñez que había mostrado sus posiciones a favor de la entrada en la OTAN tras realizar toda la gestión previa a la entrada en la CEE. Por su parte Javier Sáenz de Cosculluela entraba en el nuevo gabinete por Julián Campo en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Abel Caballero reemplazaba a Enrique Barón en el Ministerio de Transportes. Estos dos últimos cambios se interpretaron en su día como las contrapartidas obtenidas por Guerra. Por último, la remodelación se completa con la salida de Tomás de Tomás de la Cuadra del Ministerio de Administración Territorial ocupado por Félix Pons así como con el nombramiento de Javier Solana como portavoz del Gobierno en sustitución de Eduardo Sotillos. Sobre este último cambio véase, SOTILLOS, Eduardo, 1982, *el año...*, *op.cit.*.

¹⁰⁶ Junto con los altos cargos nombrados previamente por Boyer en 1982 en el Ministerio de Economía [véase *nota 81*] Solchaga partiendo del equipo de Industria iría sumando otros tantos. De modo que a los ya citados han de añadirse los siguientes: Juan Alarcón (Director General de Servicios del Ministerio de Industria y Energía, (1982-1988), Manuel Conthe (entre otros cargos, representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo), Rafael de la Cruz (Secretario General de Planificación y Presupuestos, 1984-1988), Guillermo de la Dehesa (Secretario de Estado de Economía, 1986-1988), Luis Escauriaza (Presidente del Banco de Crédito Industrial, entre otros cargos previos durante los gobiernos de UCD, en donde sería Director del Gabinete del Ministerio), Miguel Ángel Feito (Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, 1986-1988, vicepresidente del INI...), Jaime Gaiteiro (Secretario General de Hacienda, 1988-1991, Director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 1991-1993 Tributaria...), José María García (Director General del Tesoro y Política Financiera...), Joaquín de la Herrán (Subsecretario de Estado del Ministro de Economía y

Inaugurada la III Legislatura, por tanto, los dos cambios más significativos en lo que se refiere a las carteras aquí objeto de estudio, será la entrada de Luis Carlos Croissier en Industria¹⁰⁷ y de Manuel Chaves¹⁰⁸ en el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social tras la

Hacienda, 1986-1988), Leopoldo López de Aranda (Secretario General de Hacienda), Fernando Maravall (Secretaria General Técnica, 1984-1986, Director General de Estudios y Promoción Industrial del Ministerio de Industria y Energía), Enrique Martínez Robles (Subsecretario de Estado de Economía y Hacienda, 1988-1993), Miguel Muñiz (Secretario General de Economía y Planificación, 1982-1986, Presidente del Instituto Oficial de Crédito), Pedro Pérez (Secretario General de Economía y Planificación, 1986, Presidente de Tabacalera...), Jesús Rodrigo (Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Hacienda, 1985-1989), Rosa Rodríguez Moreno (Secretario General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, 1985-1989), José Juan Ruiz (Secretaria General de Economía Internacional y Competencia, 1991-1993, Jefe de Gabinete de la Secretaria de Estado de Economía...), Eduardo Santos (Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, 1985-1986), Luis Sempere (Jefe del Gabinete del Ministerio de Economía y Hacienda, 1985-1992), Julio Viñuela (Director General de Planificación, 1984-1987) o Antonio Zabalza (Director General de Planificación, 1987-1988, Jefe del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, 1988-1993, Director del Gabinete Técnico de Presidencia, 1993-...). Además como recuerdan Ignacio Alonso y Carmen Tomás el ministro de Economía tenía entre sus responsabilidades «el nombramiento de los presidentes de la banca pública, empresas con mayoría de capital público como Telefónica y Tabacalera, y directores generales con especial transcendencia empresarial como son los responsables de las empresas del Patrimonio». Entre otros cargos nombrados directamente por Solchaga estuvieron los siguientes nombres: Luis Alcaide, Germán Calvillo, Prudencio García, Francisco Luzón, Miguel Ángel Valle-Inclán, Cándido Velázquez o Francisco Zambraba. Toda la anterior información procede de, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, pp. 303-308 y a partir de elaboración propia. Véase asimismo el destino penal de no pocos de estos ‘cargos públicos’ en la misma obra (Ibídem, pp. 236-ss.). Asimismo consúltense los ‘otros colaboradores’ en la sombra del propio Solchaga en, DÍAZ HERRERA, José y TIJERAS, Ramón, *El dinero de...*, *op.cit.*, y en concreto, “IX. Los poderes del clan Solchaga” (pp. 211-238).

¹⁰⁷ Véase, primero, la *nota 54*. De hecho, Croissier para aquellas alturas era una persona de absoluta confianza de Solchaga y como apunta Juan Rodríguez Teruel, «garantizaba una política de continuidad en la política industrial». RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en...*, *op.cit.*, p. 259, *nota 336*.

¹⁰⁸ Manuel Chaves (Ceuta, 1945). Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, y posteriormente profesor en la Universidad de Córdoba. Entra a militar en el PSOE y en la UGT en 1968. Hombre clave en el socialismo español, y especialmente en la siempre poderosa federación andaluza en donde conocerá tempranamente a Felipe González –su máximo valedor y defensor– con quien colabora desde pronto en el despacho laboralista de este último. En su condición de profesor de derecho toma parte en 1972 en la constitución de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. A partir de ahí comienza su ascenso, primero, en la UGT de la que es miembro de su CEC entre 1976 a 1986. En dicha Ejecutiva llegará a ser responsable de prensa dentro de la Comisión Confederal. En 1986 dimite tanto de la CEC como del cargo antes señalado. Desde 1977 a 1990 es elegido diputado a Cortes, siguiendo su progresión dentro del PSOE. En 1981 pasa a formar parte del Secretario Ejecutivo de la CEF del PSOE tras el XXIX Congreso. En el ochenta y cuatro es nombrado Secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales de la CEF hasta 1986 cuando es asume el Ministro de Trabajo. Junto a su formación laboral pesó en su elección su trabajo en la Comisión de Política y Empleo y en la Diputación Permanente del Congreso en esos mismos años. Hasta su salida de Trabajo es miembro del Comité Federal volviendo a la CEF como Secretario Ejecutivo en el año noventa. A partir de ahí compaginará la presidencia de la Junta de Andalucía con la Secretaria General del PSOE de Andalucía desde su VII Congreso regional celebrado en 1994. Volverá, en una primera fase, a la política nacional tras el descalabro de las elecciones del 12 de marzo de 2000 cuando asume la dirección de la Comisión Política de la organización en funciones de gestión gestora. De hecho, en julio de ese mismo año tras la celebración del XXXV Congreso es elegido Presidente del PSOE sustituyendo al histórico dirigente Ramón Rubial. Cargo este último en el que permanecerá hasta la celebración del XXXVIII Congreso en noviembre de 2011. Una segunda fase será a partir de abril de 2009 cuando es nombrado Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial, hasta concluir la IX Legislatura. Datos extraídos en, declaraciones de Manuel Chaves a, IGLESIAS, M^a A., *La memoria recuperada...*, *op.cit.*; ROSELL, Francisco, *El bueno de...*, *op.cit.*; Véase asimismo algunos de sus siguientes trabajos muy significativos de su posición con respecto a los cambios habidos en el seno jurídico del mercado de trabajo: CHAVES, Manuel, “La política de empleo e inserción

marcha al Ministerio para las Administraciones Públicas de Joaquín Almunia por encargo personal del presidente¹⁰⁹. Si Croissier representa un claro perfil continuista, lo mismo sucede con la llegada de Chaves, lejos ya su etapa de sindicalista de la UGT, quien además era una persona de total confianza del propio González desde hacía muchos años. Pero todavía debe apuntarse una razón de cara a su nombramiento, que el propio Ministro indicó en su momento: “Es posible que Felipe González pudiera pensar que yo podía recuperar las relaciones con UGT”, a lo que añadía una enigmática puntualización: “y así lo hice”¹¹⁰. El resto de los cambios responden a cuestiones, o bien, relacionadas con los equilibrios internos dentro del Gobierno – como se ha advertido en más de una ocasión– entre las dos corrientes que comienzan a perfilarse en el interior del PSOE, o, simplemente por motivos de gestión política¹¹¹.

Nuevamente, tal y como avanzábamos, resultaría más relevante, en términos históricos, la nueva composición del Gobierno filtrada a la prensa la noche del jueves de 7 de julio de 1988¹¹². Han transcurrido cinco años de gestión institucional y la misma comienza a pasar factura. Semanas antes había circulado en las esferas socialistas diversos movimientos, que no dejaban de repetirse desde la celebración los días del 22 al 24 de enero de aquel año del XXXI Congreso socialista, cuya aséptico lema sería, *Ganar el futuro*. La Ejecutiva saliente de aquel Congreso en donde todavía no se divisaba una lucha frontal entre *felipistas* y *guerristas* – aunque ya se aventuraban “nubarrones” internos– se saldaría con unas pequeñas parcelas conquistadas a favor de estos últimos, resumidas básicamente en dejar fuera del máximo órgano de gobierno de la organización a Almunia y Solana, y por poco a Maravall¹¹³.

profesional de los jóvenes: conferencia inaugural”, *Economía y sociología del trabajo*, nº 1-2, (1988), dentro de un monográfico dedicado a, *Los jóvenes y empleo*: id., “Los sindicatos en la sociedad industrial desarrollada”, *Leviatán*, nº 37, (1990), pp. 25-34; id., “Democracia industrial y relaciones de trabajo”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 183-188.

¹⁰⁹ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*, p. 197. Véase asimismo, GALLEGU, Raquel y PORRAS, Antonio, “La política de gestión pública en España, 1982-1996: emprendedores políticos y ventanas de (in) oportunidad” en *VII Congreso Internacional de la CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública*, Lisboa, octubre 2002, p. 8 [www.clad.es/congresos]. Un trabajo clave para interpretar los objetivos, funciones y estrategias que se plantearon con la creación del Ministerio para las Administraciones Públicas –anteriormente denominado Ministerio de Administración Territorial y creado en 1979 con la I Legislatura– con el fin de ‘modernizar’ el aparato administrativo del Estado.

¹¹⁰ En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 214.

¹¹¹ En Sanidad Ernest Lluch es sustituido por Julián Vargas, es decir otra persona de máxima confianza e integrante del equipo económico desde principios de los años ochenta; en el refundado Ministerio para las Administraciones Públicas entra Almunia por Félix Pons; y el tercer cambio, el más significativo en lo que se refiere al organigrama del Consejo de Ministros, es la creación del Ministerio de Relaciones con las Cortes con Virgilio Zapatero a su cabeza, y que viene a sustituir al Ministerio de Presidencia que hasta entonces había estado bajo el mando de Javier Moscoso. Sobre este último movimiento Juan Rodríguez Teruel en su día señaló: «El Departamento de Presidencia era un elemento de interferencia política en la gestión del vicepresidente, de modo que lo más conveniente era su supresión de la plana ministerial». RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en...*, *op.cit.*, p. 262, nota 338. En términos generales sobre estos cambios de correlación de fuerzas dentro del gabinete consúltese, BAENA, Mariano, *Elites y conjuntos...*, *op.cit.*, pp. 191-ss.

¹¹² Véase aquí, Noticia, “González da prioridad a las crisis de Interior y Justicia”; Editorial, “El Gobierno que viene” ambos publicados en, *El País* el 9 de julio de 1988. Tan relevante como significativo sería la también noticia publicada aquel día por el mismo medio: Noticia, “González defiende la política de ajuste económico en su primer discurso tras la crisis”, *El País*, 9 de julio de 1988.

¹¹³ Como se avanzaba la composición resultante de la Comisión Ejecutiva Federal se constituiría en un escenario en donde poder visualizar futuros y duros *movimientos internos*: Presidente, Ramón Rubial; Secretario General, Felipe González; Vicesecretario General, Alfonso Guerra; Secretario de Organización, José María Benegas; Secretario de Administración y Finanzas, Guillermo Galeote; Secretaria de Comunicación, Ana Miranda de Lage; Secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores Valencia; Secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, Francisco Fernández

Lo anterior tuvo su oportuna traslación política pero tan sólo de una forma parcial y limitada. Los citados movimientos previos a la remodelación del Gobierno respondieron a la apuesta por modificar, o, por lo menos, influir en posibles cambios en las carteras económicas de mayor gasto por parte de los guerristas¹¹⁴. Un objetivo conseguido, muy parcialmente, con la incorporación de Matilde Fernández en Asuntos Sociales y Enrique Múgica en Justicia y el mantenimiento de Sáenz de Cosculluela en Obras Públicas. Ahora bien, la propia entrada de Corcuera aunque fuera en la cartera de Interior una vez enfrentado frontalmente a la UGT –tégase presente que Nicolás Redondo y Antón Saracíbar abandonarían sus escaños en octubre de 1987 tras unos años de distanciamiento cuando no enfrentamiento directo como analizaremos en el III Epígrafe– el mantenimiento de Solchaga en Economía, y la apuesta por *independientes* –Jorge Semprún o Rosa Conde– desmintieron las hipótesis de partida de un posible cambio de correlación de fuerzas en el Gabinete. Por su parte que Abel Caballero fuera reemplazado por Barrionuevo en Transportes se sumaba a las “bajas” de los allegados a Guerra. Tampoco modificó sustancialmente esta correlación de fuerzas la entrada de Javier Solana por Maravall. Así la incorporación más significativa es la de José Claudio Aranzadi en Industria –procedente del equipo de Solchaga– al frente de múltiples batallas políticas y sociales en pleno proceso de desindustrialización del modelo productivo¹¹⁵.

Prácticamente un año después, la convocatoria electoral del 29 de octubre de 1989 deparará la tercera y ajustada victoria electoral con mayoría absoluta formal, en tanto los cuatro diputados obtenidos por Herri Batasuna se ausentarán permanentemente del hemiciclo, permitiendo conservar una mayoría parlamentaria absoluta técnica al PSOE¹¹⁶. A partir de este momento sí es perceptible como comienza a pasar factura no sólo la propia gestión política, sino los errores cometidos –y no van a ser pocos– en ámbitos tan sensibles como el económico, el laboral y el social. No sólo es la huelga del 14-D de 1988 la que está detrás del desgaste electoral o directamente la política económica seguida. Debe ampliarse esta visión a otros dos ámbitos estrechamente relacionados: primero, los problemas tanto internos en el Gobierno –la

Marugán; Secretario de Cultura y Educación, Salvador Clotas i Cierco; Secretario de Política Institucional, José Luis Corcuera; Secretario de Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Alejandro Cercas; Secretario de Formación, José Félix Tezanos; Secretarios Ejecutivos: Matilde Fernández Enrique Múgica, Carmen Hermosín, José María Maravall, José Acosta, Antonio García Miralles, José Ángel Fernández Villa, María Dolores Renau i Manen, Carmen García Bloise, José María Sala Grisó y Miguel Ángel Martínez Martínez. Datos procedentes de, MARTÍN NAJERA, Aurelio, *Partido Socialista Obrero...*, *op.cit.*, p. 50. Véase asimismo el desarrollo y consecuencias de tal Congreso socialista en, “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

¹¹⁴ Una vez más Juan Rodríguez ha sido certero en sus conclusiones: «Si el equipo económico se mantuvo fuera de la influencia del sector *guerrista*, este amplió su presencia a través de un ministerio de gasto (Asuntos Sociales), acorde con el discurso de este sector a favor de un giro social, y un ministerio de mayor contenido político (Justicia). En correspondencia González nombraba dos nuevas personas de su confianza, externas al partido, en Cultura y en la portavocía [...] esta remodelación cobró especial importancia, puesto que, desde el partido, comenzaba a ponerse de manifiesto la división interna y en las relaciones con el Gobierno». RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en...*, *op.cit.*, pp. 265-269.

¹¹⁵ José Claudio Aranzadi (Bilbao, 1946). Licenciado en Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de su ciudad natal, sería nombrado vicepresidente del INI en 1984 bajo el auspicio del propio Luis Croissier. Una vez en el Gobierno, y bajo la tutela de Solchaga, tendría que hacer frente a algunos de los capítulos más complicados y duros acaecidos a raíz del proceso de desindustrialización. Aguantaría al frente de Industria hasta 1993 cuando le sucedería Juan Manuel Eguiagaray. En este año sería nombrado embajador ante la OCDE. A partir de ahí pasaría al mercado privado: asesor de Participaciones Industriales Internacionales en el BBVA, Presidente de Bravo Solution España (Grupo Italcementi)... Es autor de entre otros títulos relacionados con este periodo de, ARANZADI, José Claudio, “Una nota sobre ajuste y reindustrialización”, *Papeles de Economía Española*, nº 15, (1983), pp. 317-325 [con Oscar Fanjul y Fernando Maravall]; o, id., “La política de desinversiones en el INI”, *Papeles de Economía Española*, nº 38, (1989), pp. 258-261.

¹¹⁶ Sobre este tiempo y estos sucesos nos remitimos a, SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *El secuestro de...*, *op.cit.*, y en concreto al epígrafe, “IV. Las elecciones de nunca acabar” (pp. 107-124).

dimisión de Alfonso Guerra como Vicepresidente en enero del noventa uno— como los relacionados con el devenir en el propio seno del partido —crisis durante el XXXII Congreso (9 al 11 de noviembre de 1990) así como sus prolongaciones en las federaciones de Madrid y Andalucía—. A lo que debe sumarse la publicación en los medios de múltiples casos de corrupción.

El declive electoral socialista comenzará a ser notorio. Con todo el Gobierno que toma posesión el 7 de diciembre es el mismo que el de antes de las elecciones. Se trata de una decisión personal de González, que justifica por las impugnaciones que un recién refundado PP ha realizado sobre el recuento del voto en varias circunscripciones.

Por estos mismos senderos, la IV Legislatura va a ser “movida” dentro del Consejo de Ministros¹¹⁷. Los movimientos se producen, en la práctica, en todas las carteras durante los siguientes cuatro años. Entre los primeros cambios se ha de destacar la pronta salida de Chaves de Trabajo —mayo de 1990— víctima indirecta del enfrentamiento en la federación andaluza, al ser nombrado candidato a la Junta de Andalucía¹¹⁸. Su sustituto, Luis Martínez Noval (1990-1993)¹¹⁹, un perfecto desconocido en los círculos laborales, tampoco supondría cambio o modificación alguna de la línea seguida hasta entonces. Aunque sonaron otros nombres —entre ellos el de Carlos Romero, Ministro de Agricultura o los de José Antonio Aguiriano o Vicente Albero, estos dos últimos con un perfil más técnico— su candidatura se impuso¹²⁰. Nueva apuesta personal de González con el apoyo de Solchaga, que coincide con un momento político en que todo ya se interpreta en clave interna partidista. De esta forma, no serían pocos los que interpretarían la entrada de Martínez Noval dentro y fuera del partido como una propuesta de Guerra¹²¹ y directamente por parte de la UGT como una *mala noticia*¹²².

¹¹⁷ Véase el relato pormenorizado, entre otros, de, JÁUREGUI, Fernando, *La metamorfosis...*, *op.cit.*.

¹¹⁸ Dentro del PSOE la propuesta y aprobación de la candidatura de Chaves se produciría en medio de una durísima batalla interna, que fue interpretada como un triunfo del ‘guerrismo’. Noticia, “El sector guerrista impone a Chaves como candidato del PSOE para las elecciones andaluzas”, *El País*, 17 de abril de 1990.

¹¹⁹ Luis Martínez Noval (Infiesto, Asturias, 1948). Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y profesor del citado centro. Militante del PSOE desde muy joven ha sido diputado durante la II, III, IV y V legislatura. En las Cortes colabora desde muy pronto con Solchaga en la defensa de numerosas leyes a partir de donde se labra la fama de buen orador. Mientras tanto en el XXIV Congreso del Partido en Asturias en mayo de 1988 alcanza la Secretaría General en un complicado proceso congresual. En ese mismo año su oposición a la convocatoria de la huelga del 14 de diciembre le granjea la hostilidad de la ejecutiva UGT, obteniendo, no obstante, el apoyo de la federación en Asturias, SOMA-UGT. Considerado un hombre de aparato con influencia en la CEF, y perteneciente a la corriente guerrista, su nombramiento constituye, en gran medida una inesperada noticia. Finalizado su mandato al final de la IV legislatura compagina su actividad de diputado con la dirección del socialismo asturiano, llegando por otra parte a ser nombrado Portavoz del PSOE en el Congreso entre 1998-2000. Dejará la Secretaría del FSA en el año 2000. Posteriormente, y retirado de la primera fila de la política, ocupará puestos de alta responsabilidad. Por ejemplo, sería Consejero del Tribunal de Cuentas. Asimismo es de destacar que Martínez Noval tiene tras de sí una abundante bibliografía clave para este trabajo de investigación: MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-equidad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*; id., “Los sindicatos en la Europa de los noventa”, *Economía y sociología del trabajo*, nº 10, (1990), pp. 8-15 dentro de un monográfico dedicado a *El sindicalismo*; id., “La Europa social después de Maastricht”, *Leviatán*, nº 46, (1991), pp. 21-30.

¹²⁰ Véase, Noticia, “El cese de Chaves obliga a González a un inmediato reajuste en el Gobierno”, *El País*, 18 de abril de 1990.

¹²¹ Manuel Chaves negó en su día tal tesis a la periodista María Antonia Iglesias: «[E]stoy convencido de que Martínez Noval no fue una propuesta de Alfonso Guerra. Cuando yo le pregunté a Felipe quién iba a ser mi sucesor, él me dijo que Luis Martínez Noval y me sorprendió, porque era un político que no tenía ninguna relación con el mundo laboral. Intervénía en la Comisión de Economía; lo

Junto a estos movimientos significativos, lo que ocurre en el seno del partido en los dos siguientes años, y concretamente durante el XXXII Congreso –con el pretencioso como fallido intento de “giro socialdemócrata” tras la elaboración del *Programa 2000* y cuyo lema sería, *En una nueva sociedad*– tiene su repercusión en el Gobierno. Es tan sólo a partir de entonces cuando lo que pasa en el interior del Partido comienza a tener, de forma más o menos directa, repercusiones dentro del Gobierno.

Ahora bien será la aparición del “caso Juan Guerra” junto la posterior dimisión de Alfonso Guerra¹²³ –sustituido por Narcís Serra, eterna promesa a candidato a la presidencia del Gobierno– lo que termina con el irreal equilibrio entre las corrientes enfrentadas en el seno del Ejecutivo. La contrapartida de que los guerristas pudieran reforzar su poder, parcialmente, dentro de la organización era un triste consuelo, en tanto quedaba demostrada su pérdida de influencia en el Gobierno.

El 12 de marzo de 1991 se dará a conocer el cambio más profundo de cuantos existieron en la década objeto de nuestro estudio. Una remodelación que llega en una vez más en un complicado momento. Primero, por el escándalo mediático que ha acompañado a todo el “caso Guerra”. Segundo, por la implicación militar de España en la primera Guerra de Irak. Tercero, esta crisis de Gobierno se produce a apenas un año de las celebraciones del año noventa y dos y con una certeza: los socialistas no son imbatibles en las urnas tras los resultados de diversas elecciones municipales, autonómicas y europeas¹²⁴.

Concluido el sonado conflicto a raíz del “caso Guerra” se practicará un amplio “lavado” de cara del Gobierno, que se lleva por delante a no pocos de los ministros más veteranos. Reforzada la posición de Narcís Serra ya como Vicepresidente del Gobierno –en Defensa entraría Julián García Vargas, político cercano al equipo económico dominante– el otro pequeño vencedor será nuevamente el propio Solchaga, por más que sus ansias de poder –al estilo Boyer’ no se vean satisfechas¹²⁵. Para el propio Ministro de Economía, la caída de Guerra tiene para él

conocía Carlos Solchaga, quien tenía buena opinión de él, y Felipe González le había oído algunas intervenciones en el Parlamento y también tenía muy buena opinión de él. Y esa es la razón por la cual Felipe González le nombra mi sucesor». Y concluye señalando: «Después, efectivamente, Luis Martínez Noval apareció del lado guerrista. Pero el nombramiento fue de Felipe». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 328. Véanse asimismo las noticias al respecto publicadas en aquellos días: Noticia, “Solchaga presiona para evitar que un guerrista sustituya a Chaves”; Noticia, “González nombrará a un ministro de Trabajo que no acreciente la tensión entre Guerra y Solchaga”, ambas publicadas el 26 de abril de 1990 en *El País*.

¹²² Véanse, las primeras reacciones en, Noticia, “Martínez Noval es acogido con satisfacción por la cúpula del PSOE y con el asentamiento de Solchaga”, *El País*, 28 de abril de 1990.

¹²³ Los argumentos, acusaciones y recusaciones en torno este importante hecho en la historia del tiempo presente del país ha dado lugar a una amplia bibliografía. Las versiones sobre que existen en torno al asunto son, sencillamente, abrumadoras y para todos los gustos y públicos. Junto con la bibliografía ya apuntada, véase el testimonio que aportó el propio implicado en el segundo volumen de sus memorias. Allí no desaprovecha la ocasión, entre cartas personales entrecruzadas y recuerdos de conversaciones con el propio Felipe González, para destacar –defendida por delante la ‘inocencia’ de su hermano– realmente cual era el punto de fricción más allá de corrientes y personalismos. A saber, la orientación de la política económica: «Nunca acepté de buen grado que la política socialdemócrata del Gobierno tuviese el contraste deslegitimador del discurso liberal. Los esfuerzos por construir una sociedad más igualitaria, más humana, se veían arruinados por discursos de exaltación de los mecanismos más depredadores del sistema capitalista. Hice, durante años un enorme esfuerzo para adaptar mi discurso a los objetivos que pretendía el Gobierno. En demasiadas ocasiones ese ejercicio de coherencia me valía una reprimenda por demagogo, o ilusorio, mientras que el discurso de sumisión a los secos postulados del enriquecimiento era saludado como modelo de modernidad». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., p. 386.

¹²⁴ Nos remitimos aquí a lo planteado en el apartado “2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: entre la historia oficial/militante y la literatura partidista y otros materiales de estudio”.

¹²⁵ En torno a las ambiciones del propio Solchaga véase sus propios movimientos político, previo consentimiento de Felipe González, de cara a lograr unos *pactos de Estado* a principios de los noventa,

y su equipo una pequeña-gran conquista, quizás no tan importante como una vicepresidencia, pero sí de contenido enormemente práctico. El control directo de los ministros que participan en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE) es la primera de sus conquistas. Si a esto se sumaba que la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSES) pasaba a depender de un vicepresidente más solícito, sin ningún género de dudas, también aquello constituía una buena *noticia*. Como una buena noticia sería que Txiqui Benegas – secretario de Organización del PSOE y *número tres* de la organización y persona de la absoluta confianza de Guerra– no aceptará participar en el Gobierno en la cartera de Administraciones Públicas.

La renuncia de Benegas quien opta por quedarse en el *partido* tiene también sus consecuencias. Ya nada sería igual en adelante. En este preciso momento es cuando realmente se modificarán los criterios de selección de los Ministros: “el intento de mantener un equilibrio manifiesto entre las dos corrientes enfrentadas del partido y el recurso a la selección *interna* de ministros entre los órganos del propio ejecutivo” llega a su fin¹²⁶. La llegada de Juan Manuel Eguiagaray como Ministro de Administraciones Públicas –quien sustituye a Almunia– como parte del *cupo* de los guerristas significó, en la práctica, una pírrica victoria. Como también que cayera Jorge Semprún quien se había enfrentado con el anterior Vicepresidente en numerosas ocasiones. Su recambio, Jordi Solé Tura, tampoco devendría en *conquista* alguna para los afines a Guerra. Las otras *caídas* de otros hombres cercanos como las de Enrique Múgica –sustituido por Tomás de la Quadra-Salcedo quien volvía al Ejecutivo– y de Javier Sáenz de Cosculluela – con la entrada de Josep Borrell, Secretario de Estado con Boyer y Solchaga, y que además absorbía el Ministerio de Transportes hasta entonces con Barrionuevo– en Justicia y Obras Públicas, verifican los nuevos criterios empleados. Por si faltaban dudas la llegada de Pedro Solbes –un independiente no afiliado al PSOE– al Ministerio de Agricultura las disipó finalmente. Igualmente el recambio de Julián García Vargas por Julián García Valverde en Sanidad refuerza el “ala liberal” del gobierno. Las posiciones de Alfonso Guerra quedaban limitadas básicamente por tanto a Matilde Fernández y a Eguiagaray, sin apenas posibilidad de movimientos significativos en el nuevo gabinete¹²⁷.

En resumen, más de allá de nombres, lo que confirma todas estas alteraciones ministeriales son tres cuestiones. La primera, la permanencia cada vez más hegemónica de los equipos liberales dentro del gobierno. Segundo, la derrota o si se prefiere la pérdida de influencia de los sectores más *sociales* si es que así pueden y han de ser calificados. Y tercero, la vinculación Partido-Gobierno-Poder. Lo que se traduce a efectos prácticos, en definitiva, en el liderazgo indiscutido del Presidente del Gobierno y con él de la única política que no estuvo por la labor de modificar: la económica.

con el Partido Popular ya bajo Aznar. *Pactos* en busca de una estrategia de *atracción* y *engaño* a los sindicatos, para conseguir el *non-nato* Pacto Social de Progreso. Véase, el relato de, GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, *op.cit.*, y en concreto, “Solchaga quiere ser presidente (pp. 321-327).

¹²⁶ RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en...*, *op.cit.*, p. 274.

¹²⁷ Sobre todos estos cambios, primero, véanse: JÁUREGUI, Fernando, *La metamorfosis...*, *op.cit.*; y, RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en...*, *op.cit.*, pp. 271-ss. Junto con las memorias de los principales implicados –SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, *op.cit.*; o sin externos más, ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*– y las entrevistas de diferentes implicados con, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, y, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*. No obstante, la fuente más precisa y fidedigna son las sucesivas noticias aparecidas en *El País* en los días previos, y en concreto, Noticia, “Historia de una crisis”, *El País*, 12 de marzo de 1991. Por último, véase aquí, un pequeño de muy difícil localización, en tanto sería entregado como un *suplemento* de la revista *Tiempo* en el año 1991. Entre otros artículos que allí aparecen véanse el de, ONETO, José, “La caída” en SÁNCHEZ TRAVER, Santiago [et al.], *Proceso a Alfonso Guerra. Ascensión y caída de un Vicepresidente*, Madrid, Tiempo, 1991, pp. 13-23

III. Los ejecutivos socialistas y la reestructuración del modelo capitalista español (1982-1992)

6. La «revolución burguesa pendiente»: las vicisitudes de la *única política posible* y/o el síndrome NHA¹

«El neoliberalismo trata de presentar a la economía de mercado como el único sistema eficiente de organización social y a la crisis económica como resultado de que no se ha dejado jugar libremente al mercado. Trata de conseguir la aceptación de la austeridad presentándola como la única política económica posible, porque, como dicen a menudo sus mentores, ya sean liberales o antiguos socialdemócratas reconvertidos al liberalismo, ‘la política económica no es de derechas ni de izquierdas’».

Jesús ALBARRACÍN, *Ideología, errores y malas intenciones*².

«La respuesta oficial [...] es que no hubo necesidad de tomar ninguna decisión, que se eligió la única política posible –que curiosamente coincidía con la que recomendaba el FMI– ya que, en primer y último término, la capacidad de decisión y de consideración de alternativas por parte de los responsables de la política económica estaba mermada por la situación crítica que atravesaba la economía española tras los años del régimen autoritario y la transición política. No estaba el horno para bollos ni la cabeza para sueños. Se hizo, pues, lo que se tenía que hacer».

Fernando ESTEVE MORA, *Crecimiento y bienestar*³.

1982. “Año de la gran victoria socialista”⁴. La *retórica modernizante* concluía. Se daba paso al *mito por venir*⁵. El silogismo maquiavélico del *fin justifica los medios* se constituyó en

¹ Con estas siglas José María Maravall se refería al «síndrome ‘no hay alternativa’ (NHA)». Versión hispana del acrónimo inglés “TINA”. El autor de *El control de los políticos* ofrecía un compendio básico sobre la estrategia del Gobierno socialista al respecto. «[E]l Gobierno enmarcó su actuación económica en una estrategia que utilizaba una panoplia de argumentos diversos frente al partido y frente al electorado. El fin era evitar el castigo por unas políticas económicas que estos dos principales pensaban que no eran las mejores para defender sus intereses». A partir de ahí Maravall ofrece los cuatro argumentos retóricos-justificativos empleados, una y otra vez, tanto desde el Partido como desde el Gobierno. Por su importancia se presentan a continuación. Aunque los mismos resultan extensos se ha considerado oportuno exponerlos de la forma más completa posible. «(1) *El carácter inevitable de tales políticas*. Éstas se debían al legado de los anteriores gobiernos (*la herencia recibida*), que las habían hecho imprescindibles. Si eran duras, esto se debía a los errores de los demás [...]. El argumento se basaba en el síndrome de ‘no hay alternativa’ (NHA): las condiciones económicas serían peores si se aplicaban otras medidas [...]; (2) *La promesa de luz al final del túnel*. De acuerdo con este argumento, las condiciones económicas mejorarían como consecuencia de las políticas, pero sólo después de cruzar un ‘valle de lágrimas’. Este argumento es intertemporal [...]. El Gobierno recurrió sistemáticamente a este tipo de discurso intertemporal [...]; (3) *La oferta de compensaciones en el presente*. Las compensaciones a las políticas económicas consistían en políticas sociales pero también en iniciativas no económicas y populares. Éstas se contraponían ideológicamente a otros gobiernos alternativos [...]. [E]l Gobierno insertó políticas impopulares en paquetes de medidas más atractivos [...]. (4) *Una oposición de la que se desconfía*». MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, pp. 65 y 64-66, respectivamente [*cursiva* en el texto original].

² ALBARRACÍN, Jesús, “Ideología, errores y malas intenciones” en id. [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 25. Un discurso que a lo largo del tiempo tendría sus alzas y bajas, como recordaba Juan Francisco Martín Seco en relación a la crisis económica de los noventa: «En los momentos actuales, son pocos los que defiende la política económica oficial. Los que tan sólo hace un año –incluso meses– sostenían que existía únicamente una política económica posible, la que estaba realizando el Gobierno, hoy, al ver las consecuencias, se desenganchan y arremeten contra ella. Empresarios, banqueros, ilustres profesionales, saltan como las ratas del barco que se hunde, se lavan las manos o se apresuran a tirar la primera piedra». MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Quiebra del modelo económico español” en *ibidem*, pp. 133-134.

³ ESTEVE MORA, Fernando, “Crecimiento y bienestar. La economía que no está en el PIB” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, p. 263.

principio de realidad. La *ideología* del cambio, de la modernización, tuvieron su natural continuación a través del proyecto político y económico socialista del que se hablará en las siguientes páginas. Nuevas “consignas” aparecerían ahora ya dentro de un naciente discurso dominante: *disciplina de mercado*, el *esfuerzo solidario*, la *conquista de la paz social*. Pero ante todo no se dejaría de repetir, día sí y día también, la *idea-fuerza* de que tan sólo existía “única política económica posible”. Todo ello en la *versión hispana* de la célebre frase pronunciada en su día por la mismísima Margaret Thatcher, “There is no alternative”. A partir de donde se normalizaría progresivamente el acrónimo “TINA” para referirse a tal dogma político⁶.

Aquel sería un trayecto para nada sencillo como se encargarían, tempranamente, de avisar políticos y gobernantes. Pronto el materialismo político y económico tomaría acomodo como otro principio de realidad, tras tantos años de un proceso de aprendizaje colectivo compartido en relación al pragmatismo político socialista. Por lo demás, las sucesivas reacciones de aprobación por parte de los medios empresariales y de rechazo por parte de los sindicales comenzarían a ser parte de la tónica dominante. Los sucesivos *programas de ajuste* despejarían las dudas de quienes pensaron que los socialistas pondrían en marcha una política económica, que como se tratará de explicar y de justificar difícilmente puede ser calificada de socialdemócrata.

En este capítulo se abordarán varias cuestiones relacionadas y sin las que, probablemente, no podría llegar a interpretarse de forma correcta la compleja realidad que surgiría de la aplicación de las políticas socialistas en el campo económico. Un apartado, asimismo, que conforma la necesaria antesala tanto de cara a mostrar los grandes resultados macroeconómicos de la estrategia socialista como de cara a contextualizar el marco histórico en que se llevará a cabo la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984. Se pretende, por tanto, introducir y explicar los factores, variables y demás circunstancias que se encuentran detrás de la configuración del proceso de reestructuración del régimen socio-económico y de unas relaciones capital-trabajo que transmutarán en su fisionomía esencial.

De esta forma, en primer lugar, el presente título se interna por el singular trayecto de la historia del capitalismo en Occidente durante la segunda mitad del siglo XX. Un trayecto dominado por el enfrentamiento, a partir de los años setenta, entre dos grandes corrientes/paradigmas del pensamiento y de la práctica económica. El triunfo –parcial o total, según a que región o país nos refiramos– del nuevo liberalismo en un contexto de aguda crisis económica mundial, modificará radicalmente las concepciones político-económicas de los partidos socialdemócratas. *Cambio* que, en el caso español, será especialmente agudo. Tras recorrer, en segundo término, como el nuevo paradigma –o mejor dicho, la *nueva lógica del mercado*– se irá adoptando como la “única política posible” por los diferentes gobiernos a nivel internacional, y verificar igualmente los diversos dilemas –*trade-off*– a lo que se enfrentarán los partidos socialistas de Europa del Sur en adelante; en tercer término, arrancando de la crisis económica de España de principios de los setenta, se llegará a cómo y desde qué ángulos los gobiernos socialistas afrontarán su *salida*. Un apartado en donde no sólo se constatarán sus actuaciones, a través de los tres pilares de la lógica de la estrategia de modernización –ello una vez que se pone en marcha del *Programa Económico a Medio Plazo*– sino que además se introducirán otras tantas cuestiones definitorias de la forma y el estilo en la forma de gobernar. Al mismo tiempo se examinarán los diversos apoyos académicos-teóricos así como las políticas de legitimación social –como instrumentos de consenso y dominación– adoptadas.

⁴ SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *El secuestro de...*, *op.cit.*, p. 20. Un libro que guarda una más que estrecha relación con el publicado siete años después, id. y id., *La crisis de...*, *op.cit.*, por más que los autores dejaran entonces de hablar de *régimen* o *secuestro de la democracia*, y se conformarían tan sólo con el término *crisis*.

⁵ ORTEGA, Félix, *Las contradicciones sociales...*, *op.cit.*, p. 9.

⁶ Véase lo apuntado en la *nota 1*.

Bajo el título de “La «revolución burguesa pendiente»” se tiene por fin presentar, por tanto, una radiografía global de los principales actores políticos y económicos, de sus decisiones así de los propios institucionales-académicos a lo largo de la “década de la consolidación democrática”. Recorremos, pues, un proceso de *cambio* político, económico y social prácticamente único en nuestra historia económica ante sus dimensiones y su trascendencia posterior.

6.1. Las condiciones objetivas vs subjetivas del trance modernizador

6.1.1. Puntos de partida

«El triunfo universal del capital significa algo más que una simple derrota de todas las fuerzas que antaño se le opusieron, aunque sea también eso. Su sentido más profundo reside en la cancelación de las alternativas políticas [...]. La posibilidad de otros órdenes sociales era un horizonte esencial de la modernidad. Una vez que se desvanece esa posibilidad surge algo así como la posmodernidad».

Perry ANDERSON, *Los orígenes de la posmodernidad*⁷.

«Los mercados y sus dictados parecían invadirlo todo. Con o sin fundamento suficiente, castigaban o premiaban las actitudes de los gobiernos facilitando o dificultando la consecución de algunos de sus objetivos de la política económica».

Carlos SOLCHAGA, *El final de la época dorada*⁸.

El modelo productivo que se origina tras la II Guerra Mundial en los países capitalistas va a estar sustentando por tres puntos de apoyo generales: a) un paradigma de acumulación centrado en la generación de bienes por trabajadores no cualificados en el que primaba el uso intensivo de mano de obra; b) un novedoso marco de acuerdo entre los agentes sociales, que en paralelo a la legislación social y laboral, determinara las reglas de juego y en donde el papel del Estado deviene en central en la regulación de las condiciones socioeconómicas; c) si el anterior modelo fue viable mientras que duraron los mal llamados “años dorados del capitalismo”, se debió a un crecimiento económico constante, al control de la inflación y a unas tasas de paro bajas pero que en ningún caso deben confundirse con el *pleno empleo*. Ciertamente tampoco se añadirá nada nuevo, si se hace constar como tres experiencias fueron centrales en la consolidación del “modelo keynesiano”: la primera de ellas, el trauma de la II Guerra Mundial; la segunda, la consolidación e influencia de la URSS y de los países del socialismo real; y tercero, y en relación con los dos anteriores elementos, la fragmentación social y las amplias desigualdades de clase que pusieron en cuestión la esencia del propio modelo capitalista a raíz de la *crack del 29*⁹.

De ahí saldría lo que se ha conocido académica y socialmente como el “modelo de desarrollo fordista”¹⁰. Su principal éxito residió en asegurar la cohesión social. A todo ello se sumaría en el tiempo la idea de un “progreso indefinido” basada, en concreto, en la mejora de condiciones de vida por parte de cada nueva generación que se incorporaba al mercado. La *cuestión social* se vería correspondida con el surgimiento de un estado del Bienestar –la

⁷ ANDERSON, Perry, *Los orígenes de...*, *op.cit.*, p. 126.

⁸ SOLCHAGA, Carlos, *El final de...*, *op.cit.*, p. 25.

⁹ BILBAO, Andrés, “La posición del trabajo y la reforma del mercado de trabajo” en MIGUÉLEZ Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones de...*, *op.cit.*, p. 305.

¹⁰ Véase la definición dada en su día por Xavier Coller en su obra *La empresa flexible* y apuntada en el Capítulo 2, *nota 110*.

denominada “solidaridad impuesta”¹¹ – en lo que, sin duda, fue uno de los *saltos adelante* de las sociedades capitalistas occidentales, y, por ende, de la historia de la humanidad en su conjunto¹².

En lo que aquí nos interesa ha de subrayarse que todo lo anterior conduciría a la formación de un “modelo de seguridad vital” para la clase trabajadora: el *ciclo biográfico fordista*. Paradigma vital-profesional que afectaría, al menos, a dos generaciones de trabajadores europeos y que estuvo, en la práctica, caracterizado por, “el trabajo-empleo (asalariado) termina por convertirse en el elemento articulador y legitimador del orden social de la sociedad entera”¹³. Precisamente, la constitución de la ahora denostada *sociedad salarial* partía de la importante determinación que el propio Keynes concedió al problema del empleo como motor del crecimiento económico y, por consiguiente, de la propia viabilidad del *Sistema* en su conjunto¹⁴.

Si algo ha quedado demostrado de aquella experiencia histórica es que el planteamiento keynesiano funcionó razonablemente bien en determinados países y en una coyuntura precisa. Tanto a nivel de legitimación política como en lo correspondiente al plano económico, se *vendió* como una “atractiva tercera vía entre el modelo soviético de planificación centralizada [...] y las políticas tradicionales de *laissez-faire*”¹⁵. Eso sí también se ha de tener en cuenta que aquella sería una etapa relativamente corta dentro de la historia del capitalismo. Así, mientras esto sucedía, en paralelo, estaba fraguándose la “contrarrevolución” liberal/conservadora. En cualquier caso, el *pacto keynesiano* duró mientras que se mantuvo un equilibrio entre “un liberalismo social parlamentario y social democratización material”¹⁶.

De este modo, sería la posterior caída generalizada de las tasas de beneficios de estas mismas economías occidentales, azotadas por la crisis del petróleo de 1973, la que pondría en cuestión la misma *continuidad* del sistema¹⁷. No tardaron en llegar las críticas y las propuestas.

¹¹ Tomamos la expresión de, AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Sindical, Joaquín Leguina, “El discurso socialista en la encrucijada”, Madrid, octubre de 1987, sig. 002906-005, p. 15.

¹² Referencias centrales de este proceso en, CASTEL, Robert, *La metamorfosis de...*, *op.cit.*. Véase también, BALDWIN, Peter, *La política de solidaridad social: bases sociales del estado del bienestar europeo, 1875-1975*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

¹³ PRIETO, Carlos, “Crisis del empleo: ¿Crisis del orden social?” en MIGUÉLEZ Faustino y id. (coords.), *Las relaciones de...*, *op.cit.*, p. 534.

¹⁴ Al respecto nos remitimos a la reedición de un clásico explicativo de lo apuntado: KINDLEBERGER, Charles P., *La crisis económica, 1929-1939*, Madrid, Capitán Swing, 2009 [1973]. Igualmente consúltese la valiosa obra de, HALL, Peter A. (ed.), *The Political Power of Economic Ideas. Keynesianism across Nations*, Princeton, N. J. Princeton University Press, 1989.

¹⁵ SILVER, Beverly J., *Fuerzas de trabajo...*, *op.cit.*, p. 171.

¹⁶ ALONSO, Luis Enrique, *Trabajo y posmodernidad...*, *op.cit.*, p. 6.

¹⁷ «Los factores que han determinado este cambio de tendencia son múltiples, pero el más importante de todos ellos y el que los resume es el descenso de la tasa de beneficio que se produjo en los primeros años de la década de los setenta. Se trata, pues, de lo que la economía académica denomina *crisis de oferta*, o como Marx hubiera dicho, una crisis determinada por el hecho de que la burguesía es demasiado débil. Para el capital, la superación de la crisis exigía una estrategia cuyo objetivo fundamental debería ser el de restaurar el nivel de la tasa de beneficio que existía antes de la misma. En consecuencia, en la mayoría de los países industriales se puso en marcha lo que conocemos como *políticas de austeridad y ajuste*». ALBARRACÍN, Jesús, “Ideología, errores y malas intenciones” en id. [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, pp. 23-24 [*cursiva* en el texto original]. Igualmente véase, id., “La extracción del excedente y el proceso de acumulación” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, pp. 318-ss. Una última revisión de hondo calado sobre todo este proceso en, HUDSON, Michael, *Capitalismo puro...*, *op.cit.*. Y en lengua anglosajona consúltese también, HARVEY, David, *The enigma of...*, *op.cit.*; y, FERGUSON, Niall, MAIER, Charles S., MANELA, Erez y SARGENT, Daniel J. (eds.), *The shock of the global. The 1970's in perspective*, Cambridge, Harvard University Press, 2010.

Las primeras críticas procedieron de quienes pregonaron, primero, desde posiciones a la *defensiva*, y ya más adelante a la *ofensiva*, una vuelta al mercado en sus contornos más duros y rígidos. Si falló el modelo keynesiano en sí mismo o simplemente el sistema capitalista en su conjunto, es algo que todavía hoy genera debates interminables¹⁸.

Volviendo a la crisis de los setenta, en lo que se refiere a la discusión político-ideológica que se origina en aquellos primeros años, en torno a la economía política seguida hasta entonces, en poco o nada ayudaron las primeras “políticas anti-crisis” de corte keynesiano que se tratan de llevar adelante¹⁹. Comienza la “disolución”²⁰, el “ocaso del keynesianismo” con la contrapartida del “surgimiento de situaciones económicas que parecían superadas” así como “la necesidad de nuevos enfoques para afrontar nuevos problemas”²¹. Pues, de hecho, aquellas mismas decisiones no frenaron el crecimiento de una inflación ni un desempleo que, hasta el momento, se habían mantenido en unos “niveles aceptables”. A lo que, en breve, se sumaría la evidente debilidad del Sistema Monetario Internacional (SMI)²². Lo que unido, además, al fin de la época de las energías y de las materias primas baratas, demostraron que el posible colapso del sistema en su conjunto no era una variable a descartar²³.

A pesar de su posición hegemónica, el modelo keynesiano y fordista nunca estuvo a salvo de quienes consideraron dicha etapa como un periodo excepcional²⁴. Más pronto que

¹⁸ Véanse aquí entre otros centenares de trabajos de gran calidad los tres siguientes: PASINETTI, Luigi L. y SCHEFOLD, Bertram, *The impact of Keynes on economics in the 20th century*, Cheltenham, E. Elgar, 1999; DAVIDSON, Paul, *The Keynes solution: the path to global economic prosperity*, New York, Palgrave Macmillan, 2008; y, SKIDELSKY, Robert, *El regreso de Keynes*, Barcelona, Crítica, 2009; y unos años antes, MOCHÓN, Francisco, *Vigencia de las ideas keynesianas*, Málaga, Universidad de Málaga, 1990. En términos más genéricos: AMSTRONG, Philip, GLYNN, Andrew y HARRISON, John, *Capitalism since World War II. The Making and Breaking of the Long Boom*, Oxford, Basil Blackwell, 1991; KITSCHOLT, Herbert, LANGE, Peter, MARKS, Gary y STEPHENS, John D. (eds.), *Continuity and change in contemporary capitalism*, Cambridge / New York, Cambridge University Press, 1999; DOWD, Douglas, *Capitalism and its Economics: a Critical History*, London, Pluto Press, 2000; o, FRIEDEN, Jeffrey A., *Capitalismo global: el trasfondo económico de la historia del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 2006. Y desde otra perspectiva complementaría los trabajos de, LAVOIE, Marc, *La Economía postkeynesiana: un antídoto del pensamiento único*, Barcelona, Icaria, 2005; y, KING, J. E., *Una historia de la economía poskeynesiana desde 1936*, Madrid, Akal, 2009.

¹⁹ Véase en este sentido el estudio clásico de, AGLIETTA, Michel, *Regulación y crisis...*, *op.cit.*.

²⁰ ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, *op.cit.* p. 19.

²¹ MONTES, Pedro, *El desorden neoliberal...*, *op.cit.*, p. 25. El mismo autor unas líneas más adelante llegaría a señalar como las recetas keynesianas «estaban agotadas». *Ibidem*.

²² Entre otras obras, BARTOLANI, Sergio, *La evolución del Sistema Monetario Internacional*, Madrid, Pirámide, 1980; o, BLOCK, Fred, *Los orígenes del desorden económico mundial: la política monetaria internacional de los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestro días*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1980.

²³ Según datos de José M^a Serrano Sanz entre 1973 y 1978 el coste del crudo se multiplicó por 5,3, mientras que el precio a nivel de consumidor sólo lo hizo por 2,6. SERRANO SANZ, José M^a, “Crisis económica y transición política” en REDERO SAN ROMÁN, Manuel (ed.), *La transición a la democracia en España*. Dossier monográfico *Ayer*, n^o 15, (1994), pp. 135-164. En esta línea, véase también, NAVINÉS BADAL, Ferrán, “Crisis económica y política económica. El caso de la economía española (1964-1986)”, *Información Comercial Española*, n^o 665, (1989), pp. 25-44.

²⁴ «Para los dirigentes de las multinacionales estadounidenses, que tenían que lidiar con un mundo en desarrollo cada vez más hostil y unos sindicatos cada vez más poderosos en casa, los años de crecimiento de la posguerra fueron una época inquietante. La economía crecía a buen ritmo, se creó mucha riqueza, pero propietarios y accionistas se veían obligados a redistribuir gran parte de esa riqueza a través de los impuestos que gravaban a las empresas y de los salarios de los trabajadores. Era un arreglo con que a todo el mundo le iba bien, pero un retorno a las reglas anteriores al New Deal podía hacer que a unos pocos les fuera mucho mejor». KLEIN, Naomi, *La doctrina del...*, *op.cit.*, p. 87. En una línea similar véase también, HOLLOWAY, John, *Crack capitalism*, London, Pluto Press, 2010.

tarde, la “Escuela de Chicago”, junto con otros centros de poder, impondrían su lectura y recetas de cara a superar aquella crisis económica²⁵. Una verdadera batalla, a través de un camino para nada sencillo y con más oposiciones que las que habitualmente se han dibujado para explicar el retorno de la *escuela clásica*.

De cualquier de las formas, lo cierto es que por aquellas fechas una *nueva-vieja lógica del mercado* comenzaría a aplicarse, ahora no sólo como diagnóstico sino también como pronóstico²⁶. Lógica que respondía en lo básico a una “reacción de las clases dominantes de cada país ante la persistencia de la [...] onda larga recesiva”²⁷. Estrategia que llegaría a España tan sólo unos años más tarde en toda su plenitud. Y cuyas líneas maestras pueden sintetizarse de la siguiente manera:

- a) La lucha contra la inflación y el déficit público se convierten en verdaderas obsesiones, así como en los objetivos prioritarios para frenar la crisis económica²⁸.
- b) La elevación de los costes laborales a partir de las políticas expansivas realizadas especialmente en los años sesenta, fueron considerados como uno de los grandes responsables de la situación dada²⁹.
- c) La nueva lectura (neo)liberal que se realiza de la crisis lleva a modificar la visión dominante del papel regulador del Estado. Todo ello, en adelante, en detrimento del capital privado considerado el principal cuando no el único motor de crecimiento económico. Así pues, se llegaría a la peculiar cuando

²⁵ «Todas estas reencarnaciones comparten un compromiso para con una trinidad política: la eliminación del rol público del Estado, la absoluta libertad de movimientos de las empresas y un gasto social prácticamente nulo [...]. En todos los países en que se han aplicado las recetas económicas de la Escuela de Chicago durante las tres últimas décadas se detecta la emergencia de una alianza entre unas pocas multinacionales y una clase política compuesta por miembros enriquecidos [...]. El término más preciso para definir un sistema que elimina los límites en el gobierno y el sector empresarial no es liberal, conservador o capitalista sino corporativista. Sus principales características consisten en una gran transferencia de riqueza pública hacia la propia privada [...], el incremento de las distancias entre los inmensamente ricos y los pobres descartables, y un nacionalismo agresivo que justifica un cheque en blanco en gastos de defensa y seguridad». KLEIN, Naomi, *La doctrina del...*, op.cit., p. 39. Véase también sobre este proceso, primero y con especial atención los trabajos de, GEORGE, Susan, “A Short History of Neoliberalism. Twenty Years of Elite Economics and Emerging Opportunities for Structural Change” en BELLO, Walden, BULLARD, Nicola y MALHOTRA, Kamal (eds.), *Global finance. New thinking on Regulating Capital Markets*, London, Zed Books, 2000, pp. 27-35; id., *Informe Lugano*, Barcelona, Icaria / Intermón, 2005. Así como el estudio de, DUMÉNIL, Gérard y LÉVY, Dominique, *Capital Resurgent. Roots of the Neoliberal Revolution*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2004.

²⁶ Léase al respecto la visión crítica de ANISI, David, “Crisis y política económica” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política...*, op.cit., pp. 15-45, y en concreto el epígrafe, “1. La posibilidad de una política económica alternativa”. Igualmente, ESTEVE MORA, Fernando, “Crecimiento y bienestar. La economía que no está en el PIB” en ibídem, pp. 264-ss.

²⁷ MONTES, Pedro, *El desorden neoliberal...*, op.cit., p. 17. Por lo demás, y en relación a la tesis de las ondas del capitalismo de la que bebe el propio autor, véase, MANDEL, Ernest, *El capitalismo tardío...*, op.cit.; y id., *Las ondas largas...*, op.cit.. Asimismo consúltase, WALLERSTEIN, Immanuel, “Los ondas largas como proceso capitalista”, *Zona Abierta*, nº 34-35, (1985), pp. 1-18.

²⁸ De notable interés de cara a un panorama general es el texto de, OXLEY, Howard y MARTIN, John P, “Controlling Government Spending and Deficits: Trend in the 1980s and Prospects for the 1990s”, *OECD Economic Studies*, vol. XVII, (1991), pp. 154-189.

²⁹ Al respecto nos remitimos al ilustrativo trabajo de, BOYER, Robert, “Relación salarial, acumulación y crisis: 1968-1982” en JÓDAR, Pere y MARTÍN ARTILES, Antonio (coords.), *Crisis económica y relaciones industriales. Ensayos sobre el conflicto capital/trabajo. Estrategias alternativas*, Madrid, Grupo Cultural Zero, 1984, pp. 207-232.

no contradictoria situación de cómo el Estado sería el encargado de “transmitir en conjunto la nueva ideología para la acumulación”³⁰. Las llamadas “políticas de ajuste positivo”, que no respondía a otro afán que a una vuelta al liberalismo de principios del siglo XX, implicarán amplios recortes sociales del modelo keynesiano³¹.

- d) El modelo de trabajo seguro y estable se presentaría, qué duda cabe, en otro de los “grandes culpables” en el momento preciso en que se modifican los parámetros de producción y consumo, según la lectura liberal. La idea, la ideología, el paradigma en suma, de la flexibilidad frente a una supuesta rigidez del estatus asalariado fordista se irá imponiendo. La desregulación de los mercados laborales se constituye en su meta más inmediata.
- e) Por último se modifica el planteamiento keynesiano con respecto a la cuestión del empleo³². Se produce un abandono explícito de las políticas de pleno empleo –gran objetivo de antaño que gradualmente se transformará en una utopía– haciendo depender este mismo asunto del comportamiento de la política monetaria, empleada, en adelante, como un “arma directamente política”³³. No obstante, y esto es realmente trascendente, si hasta aquel entonces la existencia del paro era un problema de primer orden político y social, será en estos años cuando se produzca una justificación, en todas sus dimensiones, de la existencia del un alto desempleo a partir de la interpretación clásica.

No faltaron grandes patrocinadores que con evidente entusiasmo se sumaron a la “causa”. Por su parte, el BM, el FMI o la propia OCDE –organismos públicos todos ellos recuérdense– encabezarían a nivel internacional el nuevo paradigma presentado con todas las pretensiones científicas imaginable³⁴. Estamos ante lo que se conocerá como la *New Economy*.

³⁰ ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, op.cit., p. 60.

³¹ La primera formulación de esta estrategia quedaría ampliamente reflejada en, OECD, *Pourquoi des Politiques d'Ajustement Positives?* Paris, OECD, 1979. Sobre sus metas, instrumentos y justificación teórica véase el número monográfico de *Papeles de Economía Española*, n° 17, (1983), y en concreto la propia nota editorial de la Redacción de la revista, “Los motivos y formulación de las políticas de ajuste positivo de la crisis” (pp. 3-11), y ahí el cuadro 1. “Políticas de ajuste positivo: orientaciones generales”, y el cuadro 2. “Políticas de ajuste: OCDE” (pp. 5-7). Todo ello, junto a los artículos, primero, de quien redactará *Politique d'Ajustement Positif: Maitriser le changement structurel* [Paris, OECD, 1979], MICHALSKI, Wolfgang, “Claves para el cambio estructural y una recuperación prolongada” (pp. 12-24) y de, FEITO HIGUERUELA, José Luis, “Las políticas de ajuste del FMI” (pp. 54-69).

³² «Lo novedoso del keynesianismo es que invierte el orden. Ahora el pleno empleo no era la consecuencia del desarrollo económico equilibrado, sino su condición». BILBAO, Andrés, *Obreros y ciudadanos...*, op.cit., p. 41.

³³ RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El gobierno imposible...*, op.cit., p. 49, quien páginas más adelante señalaba: «La constitución de estos circuitos [financieros a través de los servicios de deuda del FMI y el BM] compone el segundo rasgo del régimen financiero. Efectivamente, la crisis económica, la crisis de gobernabilidad de las décadas de 1960 y 1970 produjo una inmediata descapitalización de la economía productiva; un proceso acelerado de financiación del ciclo económico, estimulado por la alta liquidez derivada del alza de los precios del petróleo y la circulación de una masa creciente de petrodólares». *Ibidem*, p. 51.

³⁴ Aquí de nuevo la bibliografía existente es amplísima. No obstante, los siguientes títulos –traducidos o no– han trazado un amplio retrato de los intereses que han guiado las actuaciones de los organismos públicos descritos, y concretamente del FMI. En primer término, el estudio de, AGLIETTA, Michel y MOATTI, Sandra, *El FMI. Del orden monetario a los desórdenes financieros*, Madrid, Akal, 2002, y en especial el capítulo III, “La puesta en marcha de los ajustes: un poder ampliado de crisis en crisis” (pp. 75-102). Así como los siguientes títulos: ARRIZABALO MONTORO, Xavier (ed.), *Crisis y ajuste en la economía mundial: las implicaciones y significado de las políticas del FMI y del BM*, Madrid, Síntesis, 1997; PEET, Richard, *La maldita trinidad: El Fondo Monetario Internacional, el Banco*

La resolución final del conflicto –que en más de una ocasión sería leído como una *guerra total* entre dos modelos de desarrollo– entre ambos modelos/paradigmas económicos capitalistas –keynesiano vs liberal– tendrá un conjunto de consecuencias sobresalientes en el tiempo más inmediato. Ejemplo de ello serían las sucesivas crisis económicas y políticas –por este orden y no otro– por las que atravesarían determinados países sudamericanos, para a la postre convertirse en “verdaderos laboratorios de prueba” de la *nueva lógica* en auge³⁵. Sin embargo, el impulso fundamental de la *New Economy* vendría de la mano de los gobiernos norteamericano y británico con Ronald Reagan (1980-1989) y Margaret Thatcher (1979-1990)³⁶

Mundial y la Organización Mundial de Comercio, Pamplona, Laetoli, 2004; CHOMSKY, Noam, CYPHER, James M. y BELLAMY FOSTER, John [et al.], *25 años de neoliberalismo*, Barcelona, Hacer, 2007; y concretamente, HARVEY, David, *Breve historia del...*, *op.cit.* en lo que se refiere a los siguientes apartados: “I. La libertad no es más que una palabra” (pp. 11-45); y, “III. El Estado neoliberal” (pp. 73-96). Por lo demás, IGLESIA, Jesús de (coord.), *El orden económico mundial. Fondo Monetario, Banco Mundial y GATT*, Madrid, Síntesis, 1994; VARELA, Manuel (coord.), *El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la economía española*, Madrid, Pirámide, 1994; y en concreto, ANDERSON, Perry, “Neoliberalismo: un balance provisorio” en SADER, Emir y GENTILI, Pablo (comps.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, 2ª ed., Buenos Aires, CLACSO, 2003 [bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf]. En lengua anglosajona de forma mayoritaria –incluyendo algunos títulos en francés o traducidos del mismo– es donde se pueden encontrar los análisis más numerosos. Entre otros muchos: COHEN, Benjamin J., *Organizing the world's Money: the political economy of international monetary relations*, New York, Basic Books Publishers, 1977; GARRITSEN de VRIES, Margaret, *The IMF in a changing world 1945-85*, Washington D. C., International Monetary Fund, 1986; DERTHICK, Martha y QUIRK, Paul, J., *The Politics of Deregulation*, Washington (DC), Brookings Institution Press, 1995; PASCALLON, Pierre, *Le système Monétaire International*, Paris, Les Editions de l'épargne, 1992; EDWARDS, Sebastian, “The International Monetary Fund and the Developing Countries: A Critical Evaluation”, *NBER Working Paper*, n° 2909, (1989); BLARDONE, Gilbert, *Le Fond Monétaire International. L'ajustement et les coûts de l'homme*, Paris, Les Editions L'Epargne, 1990; KILLICK, Tony, *IMP Programs in Developing Countries: Design and Impact*, London, Routledge, 1995; o, por último, TOUSSAINT, Eric, “Los programas de ajuste estructural definido por el FMI y el Banco Mundial” en *La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos*, 2ª ed., Buenos Aires, CLACSO, 2004, pp. 448-ss.

³⁵ La bibliografía aquí, de nuevo, es abundante. Entre otros muchos títulos para tan sólo la última década: BORON, Atilio A., GABINA, Julio C. y MINSBURG, Naúm (comps.), *Tiempos violentos: neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, 2004; AZÓCAR, Oscar (coord.), *Fuerzas armadas, democracia y alternativas al neoliberalismo en América Latina*, Santiago de Chile, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz / Fundación Rosa Luxemburgo, 2005; o, ÁLVAREZ, Nacho [et al.], *Ajuste y salario: las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2009. En todo caso, el libro de referencia sigue siendo en gran medida el firmado por, PETRAS, James con CAVALUZZI, Todd, MORLEY, Morris y VIEUX, Steve, *La izquierda contraataca: conflicto de clases en América Latina en la era del neoliberalismo*, Madrid, Akal, 2000.

³⁶ Dos excelentes retratos sobre este proceso histórico en, MILIBAND, Ralph, PANITICH, Leo y SAVILLE, John (eds.), *El neoconservadurismo en Gran Bretaña y Estados Unidos: retórica y realidad*, Valencia, Alfons el Magnànim, 1992; ADONIS, Andrew y HAMES, Tim (eds.), *A Conservative Revolution? The Thatcher-Reagan Decade in Perspective*, Manchester, Manchester University Press, 1994. Un estado de la cuestión clarificador en su momento en, SANMARTÍN BURGOS, Israel, “La «New Right» en los años 80 y 90”, *Historia Actual Online*, n° 1, (2003), pp. 39-53; y en, ROCA, José Manuel, *La reacción conservadora: los “nocons” y el capitalismo salvaje*, Madrid, La Linterna Sorda, 2009. E igualmente véanse, BOSANQUET, Nicholas, *After the New Right*, Hamshire, Darmouth, 1983; y, KING, Desmond S., *The New Right: Politics, Markets and Citizenship*, London, MacMillan, 1987. Asimismo para el caso de los Estados Unidos, ACKERMAN, Frank, *Reaganomics: Rhetoric vs. Reality*, London, Pluto Press, 1982; SORMAN, Guy, *La revolución neoconservadora americana*, Barcelona, Folio, 1985; STUCKEY, Mary E., *Playing Game. The rhetoric of Ronald Reagan*, New York, Praeger, 1990. Y por último, REAGAN, Ronald, *¿Una revolución conservadora?* Barcelona, Planeta, 1981, y ya tras finalizar su mandato, id., *Una vida americana*, Barcelona, Plaza & Janés / Cambio 16, 1991. Para el caso británico junto con lo ya apuntado, véase, THATCHER, Margaret, *El camino hacia el poder*, Madrid, El País/ Aguilar, 1995; y id., *Los años de Downing Street*, Madrid, El País / Aguilar, 1993. Un

de forma respectiva. Gobernantes democráticamente elegidos, quienes tras unas primeras dudas y superados no fáciles conflictos obreros cuando no militares –téngase presente el impacto de la guerra de las Malvinas o la propia huelga minera británica de los primeros años ochenta³⁷– se transformaron en sus principales promotores. Una muestra evidente de cómo desde el Estado, desde el mismo poder, la acusación del “Estado ineficaz” pasaría a ser su nueva máxima³⁸.

Detrás de la respuesta neoliberal un amplio compendio político más que teórico se escondía³⁹. La *síntesis neoclásica* vendría –como se ha adelantado– de la mano de la “Escuela de Chicago” así como de economistas como John Hicks y Paul Samuelson⁴⁰. Una escuela con sus particulares *verdades absolutas* que aunque lejos, lejísimos, de tener una verificación empírica contrastable, sería capaz de transmitir las mismas con una sinergia sin igual, hasta el punto de revertir por completo muchos de los principales puntos de apoyo de las economías capitalistas occidentales hasta entonces. *Verdades*, que, en no pocos casos, se convertirían en auténticas *obsesiones* para buena parte de los gobiernos. *Obsesiones* que en el campo concreto del mundo del trabajo serían especialmente significativas tanto por su contenido como por sus resultados finales.

balance global en, SMITHIN, John N., *Macroeconomics after Thatcher and Reagan. The Conservative Policy Revolution in Retrospect*, Aldershot, E. Elgar, 1990.

³⁷ El caso británico es ejemplar como laboratorio de pruebas de la nueva fase de acumulación del capital en su ‘versión democrática’. El *shock* necesario lo constituirían tanto la Guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982) como la huelga minera de los años 1983 y 1984. Condicionantes necesarios –tras salir triunfo frente a difíciles conflictos– para iniciar el programa radical neoliberal. Y para ello no se dudaría en emplear al ejército y a los servicios secretos fuera el coste que fuera. Véase en este caso concreto: MILNE, Seumas, *The enemy within...*, *op.cit.*. E igualmente, JACKSON, Peter (ed.), *Implementing Government Policy Initiatives: The Thatcher Administration, 1979-1983*, London, Royal Institute of Public Administration, 1985; HALL, Stuart, *The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis on the Left*, New York, Norton, 1988; LETWIN, Shirley R., *The anatomy of Thatcherism*, London, Fontana, 1992; y, finalmente, JOHNSON, Christopher, *The Grand Experiment. Mrs Thatcher's Economy and How it Spread*, Boulder, Westview, 1993. Sobre la orientación económica, COUZENS, Kenneth, “La política económica de Gran Bretaña bajo el gobierno de Margaret Thatcher”, *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, nº 4, (1982), pp. 113-136; y, WALTERS, Alan, *Britain's Economic Renaissance: Margaret Thatcher's Reforms, 1979-1984*, Oxford, Oxford University Press, 1986.

³⁸ Como avisara Fernando Vallespín hemos sido testigos de un «auténtico ‘cambio de piel’ sobre el cuerpo político». El Estado se ha visto «obligado hoy a perder soberanía en las áreas centrales de su otrora inmaculada identidad: los ámbitos políticos, militar y cultural e incluso el de su misma capacidad normativa autónoma». VALLESPÍN, Fernando, *El futuro de la política*, Madrid, Taurus, 2003, p. 15. Por su parte Robert Castel plantearía lo siguiente: «Pero el Estado social fue quizá más profundamente desestabilizado por el debilitamiento del Estado-nación, del que era la prolongación directa [...]. Así como el Estado social keynesiano había construido en parte, y en parte se basaba en él, el compromiso entre los asociados sociales en el interior de sus fronteras, también suponía un compromiso en el exterior, por lo menos implícito, con los diferentes Estados ubicados en un nivel comparable de desarrollo económico y social». CASTEL, Robert, *La metamorfosis de...*, *op.cit.*, p. 402.

³⁹ Véase el apartado “1.5. Parasitismo intelectual” en, MONTES, Pedro, *El desorden neoliberal...*, *op.cit.*, pp. 35-36.

⁴⁰ Sobre el primero de los autores, véanse, HICKS, John, *A theory of economic history*, London, Oxford University Press, 1974 [traducción al castellano, *Una teoría de la historia económica*, Madrid, Aguilar, 1984]; id. *Riqueza y bienestar: ensayos sobre la teoría económica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1986; id., *A market theory of money*, Oxford, Clarendon Press, 1990. Incluyendo aquí la revisión de parte de su obra en, WOOD, John C. y WOODS, Ronald N. (eds.), *Sir John R. Hicks*, IV vols., London, Routledge, 1989; del segundo de los autores, más allá de sus conocidos manuales de microeconomía, consúltense, SAMUELSON, Paul A., *Fundamentos del análisis económico*, Buenos Aires, El Ateneo, 1977; id., *Economía con sinceridad*, México, D.F., Lasser Press Mexicana, 1984; así como, BROWN, E. Cary y SOLOW, Robert, M. (eds.), *Paul Samuelson and modern economic theory*, New York, McGraw Hill, 1983. Finalmente consúltense también, FELDSTEIN, Martin (ed.), *American economic policy in the 1980s*, Chicago, The University of Chicago, 1994.

Así pues, por ejemplo, en un tema de vital trascendencia como las lecturas e interpretaciones en torno al empleo/desempleo, el planteamiento keynesiano sería ampliamente refutado, imponiéndose, paso a paso, como principal diagnóstico/pronóstico la “curva de Philips”⁴¹. Ahora bien, sería un artículo del conocidísimo Milton Friedman, procedente de la escuela de las *expectativas racionales*, el que se tomaría como biblia y guía del nuevo paradigma⁴². Pues, precisamente, no anduvo falto de ideología fundamentalista esta corriente de pensamiento. De este modo, Friedman, apadrinado por el mismo Friedrich A. Hayek⁴³, quien desde por lo menos los años cincuenta venía pregonando la “vuelta al mercado” con poco éxito de público, vería como en muy poco tiempo revolucionaría las nuevas concepciones económicas. Tiempo después, el historiador británico Tony Judt no dudaría en hablar de toda una “revolución intelectual” patrocinada por Friedman y el propio Hayek, incluidos los “Chicago Boys”, como ejemplo del triunfo de una gran *contrarreforma liberal*⁴⁴.

⁴¹ Véase, en primer término, lo apuntado en su día por, RECIO, Albert, “Paro, precarización laboral...”, *op.cit.*; segundo, la tesis doctoral, rápidamente caducada, de, MOLTO CALVO, Miguel Ángel, *Nuevas interpretaciones de la curva de Philips ampliada para España*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1976; y tercero, el trabajo de síntesis de, SAWYER, Malcolm, “La economía política de la curva de Philips”, *Hacienda Pública Española*, nº 117, (1991), pp. 215-227. En resumen, esta tesis vendría a finiquitar el esquema keynesiano, pues como explicó Rafael Muñoz de Bustillo: «[L]os salarios son un componente fundamental de la demanda efectiva, de forma que, bajo el supuesto generalmente aceptado de mayor propensión a ahorrar de los receptores de rentas de capital que de los receptores de rentas de trabajo, el aumento de los salarios reales, aunque se haga a costa de los beneficios (esto es por encima del incremento de la productividad), generará un aumento de la demanda efectiva y por lo tanto –en un contexto Keynesiano donde el nivel de producción depende de la demanda efectiva– un incremento en la producción y el empleo según la siguiente secuencia ▲ Salarios ⇒ ▲ Demanda de consumo ⇒ ▲ Producción ⇒ ▲ Empleo». MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Salarios, desempleo y calidad de empleo” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 165. Igualmente véase la crítica al respecto de, FUENTE, Emilio de la, “Las etapas de la política económica del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 82.

⁴² Nos referimos evidentemente a, “The Role of Monetary Policy”, *American Economic Review*, nº 58, (1968), pp. 1-17. No obstante, buena parte de estas tesis quedarían reflejadas unos años antes en, FRIEDMAN, Milton, *Inflation: Causes and Consequences*, New York, Asia Publishing House, 1963, y específicamente en, id., *Capitalismo y libertad*, Madrid, Rialp, 1966; id. y FRIEDMAN, Rose D., *Two Lucky People: Memoirs*, Chicago, University of Chicago Press, 1998; y, por último, en, id. y id., *Tyranny of the Status Quo*, San Diego, Harcourt Brave Jovanovich, 1984.

⁴³ De todos recordada su ‘obra cumbre’, HAYEK, Friedrich A., *Camino de servidumbre*, Madrid, Alianza, 2005.

⁴⁴ El autor del *Sobre el olvidado siglo XX* [Madrid, Taurus, 2008] remarcaría el triunfo de lo que llamaría ‘La venganza de los austriacos’. Señalaría en aquella ocasión lo siguiente: «Pero si preguntamos de dónde venían las ideas de los *Chicagos Boys*, vemos que la mayor influencia la ejercieron un grupo de extranjeros, todos ellos inmigrantes de Europa central: Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Joseph Schumpeter, Karl Popper y Peter Drucker». Tras recorrer su situación como «intelectuales refugiados» y como «experimentarían un resentimiento endémico hacia sus refractarios anfitriones» en la Europa Occidental que había salido de la crisis de la II Guerra Mundial y entraba en una etapa de *bonanza económica*, resultaría como los grandes *inspiradores* de la doctrina liberal provenían de hombres que «habían nacido a finales del siglo XIX». Y añadía: «Quizá merezca la pena señalar aquí que ni siquiera a Hayek se le puede considerar responsable de las simplificaciones ideológicas de sus acólitos». En cualquier caso la conclusión no dejaba lugar a dudas: «Por tanto, la victoria del conservadurismo y la profunda transformación que llevó a cabo durante las tres décadas siguientes estaban lejos de ser inevitables: fue necesaria una revolución intelectual. En el transcurso de una década, el ‘paradigma’ dominante de la conversación pública pasó del entusiasmo intervencionista y la consecución de bienes públicos a una visión del mundo que encuentra su mejor expresión en el notorio lema de Margaret Thatcher: ‘La sociedad no existe, sólo hay individuos y familias’. [...] El Gobierno ya no era la solución, sino el problema». Para argumentar finalmente: «Para que el consenso keynesiano se abandonara con tanta facilidad y aparente unanimidad, los contraargumentos debieron ser muy poderosos. Lo eran y no se presentaron solos». JUDT, Tony, *Algo va mal...*, *op.cit.*, pp. 103, 104 y 98-99, respectivamente.

Aprendidas las lecciones de las repetidas crisis del capitalismo desde finales del siglo XIX, y a la espera de que el modelo keynesiano entrará en barrena, esbozarían un análisis poco novedoso pero que en todo caso venía a constituirse en una de las posibles vías de solución. El meollo de su planteamiento residió en modificar la lectura keynesiana en torno el *trade-off* entre inflación y desempleo como una relación conflictiva⁴⁵. Su crítica a la política expansiva de gasto público, ineficaz según esta misma interpretación para contener el desempleo, harían el resto. Por lo tanto, la consecución del pleno empleo –siguiendo una vez más a Friedman– lejos de ser un factor de crecimiento se convertía en un obstáculo para el mejor desarrollo de la libertad de los capitales. Siendo esto así, el desempleo dejaba de ser un problema político y social para ser leído, en adelante, como una simple cuestión técnica: la conocida “Tasa Natural del Paro”. También denominada como la “Tasa de Paro Equilibrio” o “Tasa de Paro no Aceleradora de Inflación” (NAIRU)⁴⁶.

La predicción más o menos certera de los hechos que condujeron a la crisis de los setenta, terminaría por verificar no pocos postulados teóricos de la “Escuela de Chicago”⁴⁷, hasta conquistar la hegemonía en el terreno político y transmutarse en la ideología dominante de la “concepciones que rigen la economía internacional”⁴⁸. A partir de un argumentario convincente en un momento de cruce de crisis ideológicas desde la izquierda⁴⁹, la teoría de la

⁴⁵ Sobre el estado de la cuestión a la altura de los ochenta en torno a la inflación, FRISCH, Helmut, *Theories of Inflation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

⁴⁶ Sobre Friedman, la tasa natural de paro y la propia ‘Escuela de Chicago’, junto a las aportaciones que se recogen y se citan en varias ocasiones en Naomi Klein –*La doctrina del...*, *op.cit.* – véanse, sin ánimo ni posibilidad de exhaustividad, primero, la pomenorizada biografía de, HIRSCH, Abraham y MARCHI, Neil de, *Milton Friedman: economics in theory and practice*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1990; y segundo, RIMA, Ingrid H., *Development of economics analysis*, London, Routledge, 2001. Y, por último, la reciente obra de, PUTTASWAMAIAH, K. (ed.), *Milton Friedman: Nobel Monetary Economist. A review of his theories and policies*, New York, Isle Publishing Company, 2009. Sobre la “Tasa Natural de Paro”, y su fundamento teórico, nos remitimos a, FERNÁNDEZ CORNEJO, José Andrés y ALGARRA PAREDES, Ángel, *El mercado de trabajo en la Unión Europea. Fundamentos teóricos y políticas de empleo*, Madrid, Pirámide, 2000, y en concreto el capítulo “3. La tasa de paro natural y las estrategias de desinflación”, pp. 117-139.

⁴⁷ Como apuntara hace ya tiempo Pedro Montes: «La teoría neoclásica, arrumbada y obsoleta, ha cobrado una actualidad y preeminencia inesperadas, aunque arropada por las sofisticadas técnicas matemáticas y econométricas que la economía académica ha desarrollado. Pero sus presupuestos sociales y económicos –la exaltación del individualismo y el mercado– siguen siendo los mismos y tratan de imponerse a ritmos forzados, del mismo modo que sus recomendaciones son viejas, se han vuelto a aplicar con un rigor desconocido, tras adquirir un predominio ideológico que no puede explicarse por la coherencia lógica ni por sus resultados prácticos». MONTES, Pedro, *El desorden neoliberal...*, *op.cit.*, p. 25. Para su aplicación en España, AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002. Quienes concluirían al respecto –aunque sea adelantando acontecimientos– lo siguiente: «Ya se ha señalado que sería difícil encontrar una declaración explícita de ello por parte de algún responsable de la política económica, pero aún así utilizando el enfoque metodológico de Friedman [...], podría decirse a la luz de los hechos, que los responsables económicos del gobierno se han comportado como si su interpretación de la realidad económica española coincidiera con la del modelo teórico del síntesis neoclásica». *Ibidem*, p. 45.

⁴⁸ MONTES, Pedro, *El desorden neoliberal...*, *op.cit.*, p. 23. Y añadía: «Por tanto, una nueva doctrina debería reemplazar a la vigente con el fin de exonerar al sistema de responsabilidad y de afrontar las nuevas circunstancias en beneficio de las clases dominantes». *Ibidem*, p. 26.

⁴⁹ Desde el libro ya clásico de, ANDERSON, Perry, *Tras las huellas...*, *op.cit.*, otros tantos que se publicarían en años anteriores –muy significativo al respecto, VAL, Fernando Ariel de, *Autonomía de clase y crisis del marxismo*, Madrid, Castellote, 1977– hasta obras más recientes –por ejemplo, NEGRI, Antonio, *Goodbye Mr. Socialism: la crisis de la izquierda y los nuevos movimientos revolucionarios: conversaciones con Ralf Valvola Scelsi*, Barcelona, Paidós, 2007, dan buena cuenta de una crisis política, teórica y organizativa que parece no tener fin. Por lo demás, nos remitimos al apartado “3.3. Debates,

Tasa Natural del Paro se iría perfeccionando sin mayores contratiempos. Por ese camino, un nuevo instrumental estadístico pasaría a ser principio de realidad para las nuevas economías capitalistas occidentales. Su formulación más definida sería el antes citado NAIRU. Todo ello acarrearía tres consecuencias básicas que el profesor Albert Recio ha sintetizado de la siguiente forma:

- a) La política fiscal para el fomento del sector público deja de tener sentido en tanto impide el libre desarrollo del sector privado. Fin de las políticas tendentes al pleno empleo y de expansión del gasto público de cara a seguir reforzando y ampliando el estado del Bienestar⁵⁰.
- b) Las instituciones estatales tienden a perder su papel regulador.
- c) La culpabilización de los propios trabajadores por su situación de desempleo, algo impensable hasta entonces, adquirirá un mayor espacio a través de interconectados discursos y políticas institucionales, lo que llevaría inexorablemente a la pérdida *objetiva y subjetiva* de no pocas conquistas sociales y laborales⁵¹.

A partir de este conglomerado teórico-político se impondrá de hecho la *nueva lógica del crecimiento económico*, bien a través de vías democráticas, bien a través de golpes de Estado. Nos encontramos ante un re-descubrimiento del mercado de “inspiración prekeynesiana”⁵². Se asiste, por tanto, a la transmutación de las prioridades en las estrategias económicas⁵³. Con todo, no fueron pocas las resistencias a este cambio de modelo productivo, aunque su posterior “naturalización” como el único modelo posible haya hecho olvidar los conflictos de matiz netamente obrero, que se opusieron al recorte del aparato sociojurídico de carácter protector de la cuestión social⁵⁴. Fuera como fuese un nuevo *fundamentalismo* se impuso, y con él se consolidó una “especie de encantamiento mágico en que se cifra[ron] las esperanzas más extravagantes”⁵⁵.

lecturas, controversias en torno al *nuevo* movimiento obrero en la España en la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos”.

⁵⁰ De notable interés son los trabajos contenidos en uno de los informes más controvertidos de, OECD, *The Welfare State in Crisis: An Account of the Conference on Social Policies in the 1980's*, Paris, OECD, 1981. Muy significativo al respecto también la monografía de, PIERSON, Paul, *Dismantling the Welfare State. Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. En otra línea pero enormemente ilustrativa de lo aquí mencionado el trabajo más reciente de, WILLIAMSON, Oliver E., *Las instituciones económicas del capitalismo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.

⁵¹ Según el profesor Recio, «esta perspectiva se ha traducido en una culpabilización abierta o implícita de la clase obrera y de las instituciones que ésta había conseguido arrancar con años de luchas y acción sociopolítica, de ser las principales causantes del desempleo. El corolario es evidente. La única forma de reducir la tasa natural de desempleo es con una política de choque, de reformas estructurales que casi siempre se han traducido en recortes en las prestaciones de desempleo, los derechos colectivos o individuales de los asalariados». RECIO, Albert, “Paro, precarización laboral..., *op.cit.*, p. 60.

⁵² ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “La política económica en los años 80 y perspectivas de futuro”, *Documentación Social*, nº 88, (1992), pp. 9-24.

⁵³ BILBAO, Andrés, “La posición del trabajo y la reforma del mercado de trabajo” en MIGUÉLEZ Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones de...*, *op.cit.*, pp. 305-306.

⁵⁴ Véanse aquí, una vez más, las aportaciones de, SILVER, Beverly J., *Fuerzas de trabajo...*, *op.cit.*, p. 30. Consúltense en esta línea el también sobresaliente trabajo de, ARRIGHI, Giovanni, *El largo siglo XX: Dinero y poder en los orígenes de nuestra época*, Madrid, Akal, 1999. Y también el clásico de, NEGRI, Antonio, *Del obrero masa al obrero social*, Barcelona, Anagrama, 1980.

⁵⁵ ESTEVILL, Jordi y HOZ, José M^a de la, “Transición y crisis: la complejidad de las relaciones laborales en España” en BAGLIONI, Guido y CROUCH, Colin (comps.), *Las relaciones laborales...*, *op.cit.*, p. 355.

6.1.2. La necesaria «catarsis del pasado». *La doctrina del Shock para el caso de España*

«La determinación del proceso por el cual el modelo liberal deviene hoy en principio de realidad nos conduce a desvelar la clave del problema. Se es principio de realidad en la medida en que se es expresión de aquello que socialmente existe. En otros términos. En cuanto que sólo existe un sujeto social, aquel para el cual el capitalismo como forma de organización social resulta funcional, sólo cabe hablar de una teoría económica que consolida el capitalismo. La teoría crítica del capitalismo es la expresión del sujeto alternativo al capitalismo».

Andrés Bilbao, *Obreros y ciudadanos*⁵⁶.

Ya se ha explicado que uno –si no el más exitoso– de los logros de la estrategia modernizadora socialista residió en evitar el estallido de un conflicto social generalizado, ante las políticas de ajuste emprendidas⁵⁷. Lo que, en todo caso, no evitaría la revitalización temporal de un ciclo de lucha obrera a la *defensiva*. Asimismo se ha insistido en el peculiar contexto socioeconómico en que se ejecutó su programa económico, junto con el amplio apoyo social y electoral del que disfrutó el PSOE y sus gobiernos, hasta finales de la década de los ochenta. No obstante, en pocas ocasiones, se ha remarcado un aspecto sociológico, inclusive psicológico, que deviene en central.

De entrada, señalar que el presente trabajo no pretende inmiscuirse por tan alejadas cuestiones. Pero en cambio sí se debe hacer constar que si no se produjo un estallido social ante la violencia política, social y económica que conllevó el citado proceso de modernización, esto tuvo mucho que ver con una especie de “entusiasmo” y “aceptación pasiva” por parte de un amplio sector de la ciudadanía ante las medidas adoptadas. Nos encontramos ante lo que no pocos autores han denominado como el *éxito de la ideología de la modernización*⁵⁸. Aceptando, en no pocos casos por esta misma vía las propias tesis oficiales del socialismo español, que no se cansaría en repetir la frase del “éxito de esta tarea modernizadora” a la menor ocasión⁵⁹. Evidentemente medir los dos supuestos indicadores anteriores no es posible ni viable desde una concepción de lo histórico por más que las *encuestas* y otros indicadores sociológicos puedan ofrecer diversas aproximaciones. Sin embargo, si contamos con un conjunto de interpretaciones que nos pueden ayudar a resolver algunas hipótesis de partida.

⁵⁶ BILBAO, Andrés, *Obreros y ciudadanos...*, *op.cit.*, pp. 46-47.

⁵⁷ Nos remitimos aquí al Capítulo “11. En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero/febrero 1984-julio 1984)”.

⁵⁸ «Los ideólogos socialistas se han inventado un discurso para legitimar la subordinación de la clase obrera al nuevo papel de España en la división internacional del trabajo. *El modernismo*, la *modernidad* y la *modernización* se proponen describir (y justificar) el desplazamiento masivo de trabajadores y la transferencia de capital de las industrias nacionales establecidas a los sectores improductivos. El cambio de fábricas a bancos, de maquinaria a hoteles, de la producción en fábricas a la producción doméstica, todo queda incluido en el vacío eslogan de ‘modernización’». PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en *id.* y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, *op.cit.*, p. 48. Concluyendo más adelante: «La modernidad es la ideología de los profesionales en ascenso social, así como su justificación ideológica: generalizan para toda la sociedad lo que realmente es un fenómeno de ámbito clasista». *Ibíd.*, p. 49.

⁵⁹ Por ejemplo en, AHFPI, PSOE-CE, “Memoria de gestión de los órganos federales [al] 33º Congreso del PSOE. Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo de 1994, sig. Fc 1378, p. 8. Como criticara duramente Carlos Berzosa: «Lo que sucede es que algunos logros parciales se presentan como éxitos y como medidas que imponen unos sacrificios necesarios para conseguir un saneamiento que conduzca a una salida a la crisis en el futuro. Estos logros se están consiguiendo sobre los hombros de los más débiles, tanto dentro de las economías nacionales como a nivel internacional». BERZOSA, Carlos, “La política económica del PSOE. Condicionantes y presupuestos” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 78.

Transformada la estrategia de la modernización en la ideología dominante del *cambio* desde las mismas elecciones de octubre de 1982, si la misma tuvo tan amplia aceptación, incluso por sectores distantes del socialismo, en primer lugar, fue posible por lo que Félix Ortega denominó la “desmemorización colectiva” por la que atravesaría mayoritariamente la sociedad española en aquel periodo de tiempo:

«[E]ra necesaria esta catarsis del pasado capaz de liberarla de sus demonios familiares, pero a condición de no ignorarlos, para impedir que se le cuelen por la puerta de atrás. No se trata de revanchas que a nada conducen, sino simplemente de conocer la innegable continuidad que hay entre ese pasado ominoso que se suele demostrar y el presente»⁶⁰.

En esta particular situación mucho influyó, en segundo término, la generación de un discurso mitificado sobre la transición a la democracia en pleno proceso de consolidación del régimen político-económico. Tema éste cada vez más atendido y por donde han venido proliferando discursos cada vez más disidentes y/o críticos sobre tal periodo histórico⁶¹. Así por este mismo camino surgieron algunos poderosos *clichés*, lo que junto con la evidente instrumentalización de la *memoria histórica común* en torno a nuestro reciente pasado traumático vivo, ayudaron a conformar un singular imaginario colectivo social compartido. Ahora bien, lo anterior no explica por sí sólo nuestro interrogante de partida.

La norteamericana Naomi Klein en un libro con cierta difusión en España, y criticado, en concreto, por un conjunto de economistas liberales que vivieron en primer persona este periodo cuando no fueron sus protagonistas; ha venido a plantear una particular teoría de cara explicar cómo fue posible el triunfo del neoliberalismo en su versión más fundamentalista⁶². Resulta que lo novedoso en términos históricos de aquel propio proceso, sería su dimensión mundial cuando la “utopía capitalista”, en palabras de Klein, estuvo más cerca que nunca de realizarse.

Presentado el nuevo paradigma como una receta científica –todo ello enmarcado con no pocas *dosis de fe*⁶³– ante la crisis de los años setenta, los primeros ensayos de la refundada escuela clásica vendrían, en una primera y prolongada fase, de golpes de Estado. A saber: el de Chile en 1973 como el ejemplo más universal. No obstante, aquel modelo *manu militari* era difícilmente exportable a otras latitudes. Pues como afirma la misma autora debe partirse del hecho de que “a principios de los años ochenta, *no había un solo caso* de democracia pluripartidista que hubiese abrazado de lleno de libre mercado”⁶⁴. Así republicanos como Richard Nixon (1969-1974) en una primera etapa “continuó desprendiéndose de aún más

⁶⁰ ORTEGA, Félix, “La modernización social..., *op.cit.*, p. 47. Junto con todo lo ya mencionado, véase la descriptiva obra de, ESLAVA GALAN, Juan, *La década que nos dejó sin aliento*, Barcelona, Planeta, 2011.

⁶¹ Véase lo apuntado en el Capítulo “3. A vueltas con la historia social: debates, controversias y dilemas del historiador social hoy en España”.

⁶² Dos ejemplos son lo suficientemente claros de lo anterior: TORTELLA, Gabriel, “La paranoia económica”, *Revista de Libros*, nº 141, (2008), pp. 9-11; y, ya en otra escala, SÁNCHEZ ALONSO, Blanca, “Dr. Frieden y Ms. Kein”, *Libro de Economía y Empresa*, nº 2, (2008), pp. 12-13.

⁶³ «Como todas las fes fundamentalistas, la economía de la Escuela de Chicago es, para los verdaderos creyentes, un sistema cerrado. La premisa inicial es que el libre mercado es un sistema científico perfecto, un sistema en que los individuos, siguiendo sus propios intereses, crean el máximo beneficio para todos. Se sigue ineluctablemente que si algo no funciona en una economía de libre mercado –alta inflación o desempleo– tiene que ser porque el mercado no es auténticamente libre. Tiene que haber alguna intromisión, alguna distorsión del sistema. La solución de Chicago es siempre la misma: aplicar de forma más estricta y completa los fundamentos del libre mercado». KLEIN, Naomi, *La doctrina del...*, *op.cit.*, p. 82.

⁶⁴ *Ibídem*, p. 181 [*cursiva* en el texto original].

elementos de la ortodoxia de Friedman y aprobó un elevado número de leyes que imponían a las empresas estándares más estrictos en materia de seguridad y medio ambiente”⁶⁵.

Lo que aconteció en los “países libres” en los siguientes años es lo suficientemente conocido para entrar sólo en los detalles necesarios. Lo que viene a resolver la hipótesis de partida de la misma Naomi Klein es que para la implantación de proyecto neoliberal, no sólo tuvo que evidenciarse el fracaso de las políticas de inspiración keynesiana. A este factor vendría a sumarse un *necesario shock colectivo* que en cada país capitalista demostraría la *no cuestionable* necesidad social y económica de soluciones drásticas para problemas socioeconómicos agudos. Es decir, la versión liberal española del “cirujano de hierro” del primer tercio del siglo XX.

Como se mencionó la *escuela clásica* se había mantenido en un modesto plano secundario durante no poco tiempo, a la espera de la llegada de la crisis económica. Esperada oportunidad para relanzar su proyecto político⁶⁶. Llegado el momento lo que tocaría aplicar sería una necesaria “terapia de *shock*” o “tratamiento de choque económico”. No faltan los ejemplos que certifiquen como a cada crisis traumática en un país concreto durante avanzada la segunda mitad del siglo XX, le ha acompañado la implantación de este modelo: desde el mismo Chile, pasando por los Estados Unidos y Gran Bretaña, o la Argentina de Alfonsín en 1983, China tras 1989, la Rusia de Boris Yeltsin o las propias guerras de Yugoslavia ya los años noventa. En su versión “democrática” una vez que se produce el “deseado” *shock* tan sólo existieron “dos grandes reglas acerca de cómo debían ser las sociedades: había que celebrar elecciones para votar a nuestros políticos, y las economías debían aplicar el modelo de Friedman”⁶⁷.

Sinteticemos. La historia del triunfo del nuevo capitalismo en la década de los ochenta fue viable por la re-implantación de un renacido “imperialismo intelectual”, y, por la puesta en marcha de un “programa de transformación capitalista radical”⁶⁸. Se iniciaba así “una marcha triunfal, sencilla y sin problema, de [la] ideología de la Chicagos Boys”. Como ha recordado la misma autora, y esto es substancial para el caso español, “los numerosos países que se sumaban a la ola democrática no dejaban pasar la ocasión para celebrar [...] la necesaria coincidencia entre ‘ciudadanía libre’ y ‘mercados libres’ y sin limitaciones”⁶⁹.

Superado el trauma inicial y la catarsis colectiva correspondiente, vendrían las *sugerencias y recomendaciones* del BM y del FMI iniciándose una *política de chantaje* que se prolongaría en el tiempo, y que no haría más que aumentar la dependencia de las economías

⁶⁵ Ibídem, p. 180.

⁶⁶ «Durante más de tres décadas, Friedman y sus poderosos seguidores habían perfeccionado precisamente la misma estrategia: esperar a que se produjera una crisis de primer orden o estado de *shock*, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperaban del trauma, para rápidamente lograr que las ‘reformas’ fueran permanentes». Y continuaba la autora señalando: «En uno de los ensayos más influyentes, Friedman articuló el núcleo de la panacea táctica del capitalismo contemporáneo, lo que yo denomino doctrina del *shock*. Observó que ‘sólo una crisis –real o percibida– da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable’». Ibídem, p. 27, la autora cita la obra *Capitalismo y libertad* por su primera versión [*Capitalism and Freedom*, Chicago, University of Chicago Press, 1962, p. IX]. Véase asimismo aquí, RAYACK, Elton, *Not So Free to Choose. The Political Economy of Milton Friedman and Ronald Reagan*, New York, Praeger, 1989, junto con lo ya apuntado previamente en la nota 42.

⁶⁷ KLEIN, Naomi, *La doctrina del...*, op.cit., p. 32. Y asimismo, GABRIEL, Juan, *Pinochet's Economist. The Chicago School in Chile*, New York, Cambridge University Press, 1995.

⁶⁸ KLEIN, Naomi, *La doctrina del...*, op.cit., p. 195.

⁶⁹ Ibídem, p. 218.

nacionales. De hecho, “[e]l sucio secreto de la era neoliberal es que estas ideas jamás fueron derrotadas en el campo de batalla de las ideas ni tampoco fueron abandonadas por los ciudadanos en las elecciones”⁷⁰. En la práctica, dos décadas largas tardarían en reconstruirse los primeros núcleos de resistencia, precisamente, en América Latina, el inicial y más probado laboratorio del experimento neoliberal⁷¹.

Aquella historia del triunfante capitalismo tuvo en cada caso sus particularidades nacionales. En lo que respecta a España, el *shock necesario* tendría varios episodios traumáticos cuando no violentos. Desde el fallecimiento del dictador pasando por la crisis económica que llevaría a desatar una de las oleadas conflictivas obreras más impresionantes de la Europa occidental contemporánea, sin olvidar la violencia política de las organizaciones paramilitares de la ultraderecha o de las organizaciones armadas de la extrema izquierda⁷², e inclusive hasta el mismo 23-F –sin olvidar otros intentos de *golpes de estado* frustrados– son algunos de los capítulos sincrónicos del *shock necesario* versión hispana. Movimientos sistémicos que acompañados o no se mostrarían con cada vez más fuerza en los meses previos al triunfo electoral socialista⁷³.

En este estado de catarsis, de parálisis o de *shock* como ha insistido la propia Klein, llegaría el triunfo electoral del PSOE. Con una sociedad volcada de forma mayoritaria, aunque no totalmente, con el proyecto socialista, y diezmadas las fuerzas opositoras de la izquierda histórica tras la aceptación de un modelo político de mercado –Constitución de 1978– de un modelo económico capitalista –los *Pactos de la Moncloa* de 1977– y de un sistema de relaciones laborales que cortó no pocas aspiraciones del antes potente movimiento obrero –el Estatuto de los Trabajadores de 1980– el proyecto de modernización socialista podía comenzar sin mayores obstáculos. Todavía más teniendo presente un aspecto que no debe minusvalorarse:

«La clase dominante española no tenía, aparentemente, razones inmediatas para desear el cambio. La economía se deterioraba pero se mantenía la recuperación de beneficios y la mejora de la situación empresarial. No parece que el hundimiento de la UCD se correspondiese con una insatisfacción inmediata del capital frente la acción del gobierno, excepto por algunas fracciones importantes del mismo, como puede ser el capital financiero. Más relevantes pudieron ser las consideraciones a medio plazo, la importancia atribuida a su capacidad de gestar la economía en las nuevas condiciones que se avecinaban. El capital en España probablemente admitió el cambio –e incluso ciertos sectores modernizantes pudieron desearlo– para que nuevas fuerzas mejor aceptadas por los trabajadores, para quienes se auguraba una situación todavía más dura, condujeran la nueva etapa»⁷⁴.

En resumen, el modelo de Naomi Klein no debe interpretarse como un constructo teórico *puro*. Acaso como una interpretación más para dirimir, una vez más, las condiciones necesarias con las que contaron gobierno y fuerzas productivas para iniciar la segunda etapa del proceso de reconstrucción del capitalismo nacional. También es evidente, que en comparación con otros proyectos neoliberales, el caso del socialismo español sería más moderado por lo menos hasta 1993 con la llegada de Pedro Solbes al Ministerio de Economía, cuando entonces de forma decidida se emprendería a ultranza dichas medidas. Políticas que serían continuadas

⁷⁰ *Ibidem*, p. 586.

⁷¹ Junto al ya citado libro de, PETRAS, James con CAVALUZZI, Todd, MORLEY, Morris y VIEUX, Steve, *La izquierda contraataca...*, *op.cit.*, véase, HARNECKER, Marta, *La izquierda después de Seattle*, Madrid, Siglo XXI, 2002.

⁷² Véase lo apuntado en el Capítulo 4, *nota 181* y *nota 258*.

⁷³ Nos remitimos a lo apuntado en el apartado “4.2.2.3. La moderación programada (1979-1981)”, y en concreto al relato que ofreció en su momento, SERRA, Narcís, *La transición militar...*, *op.cit.*.

⁷⁴ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en *id.* (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 46. Consúltense también el trabajo de, HERNÁNDEZ ANDREU, Juan, *Economía política de...*, *op.cit.*; y de forma específica, GUINDAL, Mariano, “Felipe González pacta modernizar España” en *El secreto de...*, *op.cit.*, pp. 197-ss.

sin los menores dilemas por los gobiernos conservadores populares a partir de 1996⁷⁵. Pero esa es otra historia.

6.1.3. La crisis económica *diferencial* española: la construcción de las «condiciones necesarias»

Los jerarcas y tecnócratas franquistas procedentes de la “Obra” en mayúsculas, del *Opus Dei*, habían asentado las *condiciones necesarias* de la futura “modernización” de la economía española muchos antes de que la “Escuela de Chicago” conquistara posiciones de prestigio⁷⁶. Ahí están los *planes de estabilización* de los años cincuenta del siglo XX. Junto a la respuesta económica que significaron aquellos *planes de estabilización*, los mismos se terminaron por constituir en toda una respuesta política por parte del franquismo para asegurar no tanto su supervivencia –garantizada en caso extremo por el ejército– sino de cara a su propia legitimación política⁷⁷.

Aunque no pretende el presente trabajo inmiscuirse por un debate inconcluso y abierto a notables divergencias, cuando menos se deben realizar algunas anotaciones⁷⁸. De este modo, si, por un lado, la involución y la cerrazón política del régimen se terminaría por convertir en el *nodo central* de la imposibilidad de autosucederse tras el fallecimiento de Francisco Franco; por el contrario, los cambios sociales, económicos y culturales producidos a raíz de los *planes de desarrollo*, generarían una contradicción mayor a la par que definitiva. A saber, la manifiesta incapacidad de la dictadura franquista en dar respuestas políticas a las demandas de una ciudadanía disidente si bien no mayoritaria pero sí con cada vez más amplio eco social, lo que junto un movimiento obrero de la mano de las Comisiones Obreras fortalecido y con alto nivel de conciencia entre sus filas, mostraron que el tiempo del franquismo comenzaba a agotarse. Sí fue el factor político el determinante o sí lo fue el factor socioeconómico estructural o simplemente una combinación de ambos, los que originaron las otras *condiciones necesarias* para el cambio político es lo que se discute. Lo único cierto es que la siempre mencionada correlación de fuerzas alcanzaría a mediados de los años setenta su punto culmen.

Todo lo anterior, junto con los *resultados finales* de la transición postfranquista, va a devenir en fundamental en el marco de operaciones del primer Gobierno socialista. Apadrinado y adoptado el *paradigma de la modernización*, se terminará interpretando como el desarrollo económico capitalista franquista –marcadamente *de clase*– a fin de cuentas había sido un prerequisite inevitable para asegurar la llegada de la democracia. En el lenguaje político asumido para entonces por los propios socialistas aquello se constituiría en una especie de pre-etapa de la “revolución burguesa pendiente”. Aunque tal punto de partida resultaba poco o nada novedoso cuando no contradictorio, los técnicos socialista no hacían otra cosa que sumarse a los

⁷⁵ Véase la bibliografía apuntada en el Capítulo 4, *nota* 256.

⁷⁶ Remitimos aquí a la visión cuando menos condescendiente sobre el asunto de, CASPISTEGUI, Francisco Javier, “Los matices de la modernización bajo el franquismo” en MATEOS, Abdón y HERRERÍN, Ángel (eds.), *La España del...*, *op.cit.*, pp. 251-270.

⁷⁷ Sobre este capítulo concreto nos remitimos al completo trabajo de, TORRE, Joseba de la y GARCÍA-ZÚÑIGA, Mario (eds.), *Entre el mercado y el estado: los planes de desarrollo durante el franquismo*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2009. Una visión crítica tantas veces citada, pero del todo aclaratoria en, GUERRERO, Diego, “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*.

⁷⁸ De entrada véase la conocida aportación al respecto de, LINZ, Juan José, “Legitimacy of Democracy and the Socioeconomic System” en DOGAN, M. (ed.), *Comparing Pluralist Democracies: Strains on Legitimacy*, Boulder, Westview Press, 1988, pp. 65-113 [véase también en el Capítulo 3, *nota* 282]. Desde una visión netamente diferente, ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, y en concreto, el subapartado, “d) La legitimación social” (pp. 85-87).

que los teóricos de la modernización liberal habían considerado como las “condiciones necesarias” para la implementación de tal proyecto.

¿En qué consistían aquellas repetidas “condiciones necesarias?” Pues, según uno de sus mayores teóricos a la par que impulsores, S. N. Eisenstadt el camino para el acceso de la democracia estaría marcado por un determinado nivel de desarrollo económico,

«como condición necesaria para el desarrollo de toda estructura moderna, la proyección ulterior de estos índices no asegura necesariamente una proyección continua de modernización, de creación de una estructura política o social viable, capaz de crecimiento sostenido, y capaz de resolver nuevos problemas sociales, económicos y políticos»⁷⁹.

Asumidos estos postulados, formulado el proyecto de la modernización socialista en clave interpretativa de la *revolución burguesa pendiente*, de lo que se trataría, en adelante, sería de continuar en lo medular con lo realizado hasta el momento. Ahora bien, la particular situación por la que atravesaría la economía española durante los años setenta impondría unos ritmos, unas etapas y una *intensidad reformista* que, en suma, se transformarían en los elementos diferenciadores, a nivel socioeconómico, entre las políticas de los gobiernos ucedistas y socialistas. *Elementos diferenciadores* que, en cualquier caso, nunca cuestionarían lo medular: el modelo capitalista español.

«Una vez más se demostró que el pueblo entiende a la perfección los discursos viriles de *sangre, sudor y lágrimas* y que respalda a quien abandona la demagogia y expone la verdad».

Enrique FUENTES QUINTANA, intervención en TVE el 8 de julio de 1977, tras jurar su cargo como Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía⁸⁰.

Los primeros indicios serios de la crisis económica internacional llegan a España con un cierto retraso. En todo caso, a partir de 1974 la misma se hará notar con toda su intensidad a marchas aceleradas. La lectura que realizan tanto los últimos equipos económicos del franquismo como el primer y segundo Gobierno de la Monarquía es que se trata de una crisis económica coyuntural. Lo que a su vez conducirá a que “el clima mantenido de incertidumbre, la sensación de provisionalidad en los mismos gobernantes y el escaso reconocimiento social de su autoridad” se transformaría en la tónica generalizada⁸¹.

⁷⁹ EISENSTADT, Shmuel N., *Modernización. Movimientos de...*, op.cit., p. 242. El propio autor matizaba que incluso cumpliéndose estas mínimas condiciones, han de tenerse presente, de igual forma, otros múltiples factores estrechamente interrelacionados. Así mismo, y desde otras perspectivas e intereses metodológicos radicalmente diferentes, véanse la obra básica de, Rostow, quien viene a aportar su particular examen de la modernización por acumulación de etapas: ROSTOW, Walt W., *Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista*, México / Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1973. Una crítica sobre estas interpretaciones unilaterales en, ESTEVE MORA, Fernando, “Crecimiento y bienestar. La economía que no está en el PIB” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política...*, op.cit.. Otro clásico sobre el asunto, de especial importancia por las tesis mantenidas en, MISHAN, Edward, *The Economic Growth Debate: An Assessment*, London, George Allen & Unwin, 1977.

⁸⁰ Cita extraída de, VELARDE, Juan, *Cien años de economía española*, Madrid, Ediciones Encuentro, 2009, p. 286.

⁸¹ SERRANO SANZ, José M^a, “Crisis económica y transición política” en REDERO SAN ROMÁN, Manuel (ed.), *La transición a...*, op.cit., p. 142.

En palabras del dirigente socialista Francisco Fernández Marugán se produce en estos años una conjunción de factores que darán lugar a una “crisis diferencial”⁸², y que conducirá a que la economía española “durante siete años consecutivos [tenga] un crecimiento económico inferior al correspondiente de la CEE y la OCDE”⁸³. Veamos algunos indicadores básicos:

- El crecimiento económico entre 1976 y 1982 fue tan solo del 1,5 medio de promedio anual, mientras que las economías de la OCDE tuvieron una tasa anual del 4%⁸⁴.
- La destrucción neta de empleo es considerable: un 9% entre 1979 y 1983, mientras que la tasa de paro crece un 7,8%. Mientras tanto, y según la Central de Balances del Banco de España, el sector empresarial reflejaría una pérdida del 1,1% en sus ventas para el *año del cambio*⁸⁵.

⁸² Definida así también por el propio Fuentes Quintana de la siguiente manera: «Esos factores generales, que estaban tras la crisis económica mundial de los años setenta, adquirieron una presencia diferencial en el caso de la economía española, por su mayor sensibilidad a las causas de la crisis, dada nuestra fragilidad energética, la acusada debilidad de nuestra balanza de pagos, y por las consecuencias de la intensa crisis industrial, ya que los sectores en peor situación general duplicaban su presencia relativa en España respecto de la media de los países de la OCDE». FUENTES QUINTANA, Enrique, “La economía como profesión: Una memoria personal” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., p. 741. Otra visión alternativa sobre la ‘crisis diferencial’ en, SEVILLA SEGURA, José V., “Crisis económica y crisis diferencial de la economía española” en *Economía política de...*, op.cit., pp. 15-54. Y una visión radialmente diferente en, CATALÁN, Jordi, “Del «milagro» a la crisis: la herencia económica del franquismo” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., pp. 92-132.

⁸³ FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., pp. 135-138. Sobre todos estos aspectos consúltese la obra de dos influyentes economistas procedentes o cercanos al denominado *partido del antifranquismo* y más tarde reconvertidos a la ‘causa’ liberal: GARCÍA DELGADO, José Luis y SEGURA, Julio, *Reformismo y crisis económica: la herencia de la dictadura*, Madrid, Saltes, 1977. Especialmente interesante en relación a los datos que se aportan sobre las élites políticas económicas de aquel tiempo.

⁸⁴ Véanse los datos ofrecidos en, *Perspectives Économiques de l'OCDE*, n° 36, (diciembre 1984). En esta línea consúltese también, DÜRR, Ernest [et al.], *Paro, inflación y crecimiento. La experiencia española, 1973-80*, Madrid, Espasa-Calpe, 1980. Y asimismo en relación a la publicaciones de estos mismos años resulta altamente aclaratorio del proceso de transformación económica los trabajos de, ALBIZU, Manuel, *Análisis de la política económica española y de sus efectos en el período 1970-1980*, Barcelona, Hogar del Libro, 1984; BAIGES, Josep, MOLINAS, César y SEBASTIÁN, Miguel, *La economía española...*, op.cit.; y unos años antes, ROMAN, Manuel, *The limits of economic growth in Spain*, New York, Praeger Publisher, 1971; y del mismo autor, id., *Hertodox views of finance and cycles in the Spanish economy*, Aldershot, Ashgate, 2002.

⁸⁵ Datos procedentes de, MARTÍN ACEÑA, Pablo y MORENO, Begoña, “Miguel Boyer Salvador” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, op.cit., p. 213. Por su parte Donato Fernández y Gustavo Matías recogiendo las cifras de la siempre *fiable* “Asociación para el Progreso de la Dirección” señalaban lo siguiente: «Entre 1973 y 1981, el porcentaje del beneficio neto sobre [...] 206 empresas, cayó desde el 23,4% al 3%». FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit., pp. 43-45. Por otro lado, en mayo de 1983 El País informaba como a lo largo del año anterior se habían producido 893 suspensiones de pago y 152 declaraciones de quiebras, según el INE. Todavía más, pues, los «pasivos, deudas pendientes de pago, se elevaron a un total de 200.056 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 46,6% sobre el año anterior». Noticia, “983 suspensiones de pago y 152 declaraciones de quiebra en 1982”, *El País*, 22 de mayo de 1983. 1982 se Consúltense también la información estadística aportada por, EQUIPO DE COYUNTURA ECONÓMICA, “Crisis económica, distribución de la renta y caída del excedente empresarial”, *El País*, 24 de febrero de 1980. Y para una visión a largo plazo, PÉREZ GARCÍA, Francisco, “El crecimiento del capital de la economía española”, *Papeles de Economía Española*, vol. I, n° 100, (2004), pp. 31-41,

- Niveles de inflación con una media superior al 17 por 100 entre 1976 y 1982. De hecho, en el año 1977 la inflación comenzaría a situarse en torno a un 40% en su tasa anual, viéndose rápidamente frenada por las medidas contempladas en los *Pactos de la Moncloa*⁸⁶.
- La balanza por cuenta corriente en 1982 se cerraría con un déficit de más de 4.000 millones de dólares (-2,3% del PIB) así como con fuertes pérdidas de reservas de divisas.

A todos estos problemas se deben añadir otros de naturaleza estructural y que, a la postre, marcarían el proceso de recuperación económica: la crisis industrial y energética, la paralización de la reforma fiscal, los problemas de liberalización del sistema financiero, el fuerte proteccionismo económico... Problemas que se manifestarían en todas sus dimensiones con la llegada de la segunda crisis del petróleo en 1979, cuando el precio del crudo subiría en aquel mismo año de media un 70%⁸⁷.

Planteado tal esquema de partida, lo que van a diferir son las diversas lecturas en torno a las posibles salidas de la crisis. Alejados de las visiones hegemónicas, a saber la *liberal*, cuyas propuestas no sólo es que fueran finalmente las aplicadas sino que apenas serían objeto de debate político, interesa detenerse en otras “lecturas alternativas” para completar este contexto histórico⁸⁸. Al respecto, y por citar un análisis que consideramos lo suficientemente explicativo de lo que aconteció, el ya desaparecido Jesús Albarracín siempre insistió como entre las causas del tal crisis había de destacarse el carácter escasamente competitivo y productivo de la economía española. Así pues, el gran problema de fondo sería la apuesta del franquismo por un singular modelo de acumulación capitalista caracterizado por ser:

«intensivo en capital y ahorrador de trabajo –esto es, aunque la inversión introducía cada vez más capital por trabajador– lo hizo mucho menos que en el resto de los países industriales. La productividad creció, pero no de forma suficiente como para acortar el desfase. El resultado ha sido una economía menos competitiva»⁸⁹.

El modelo se mantuvo mientras que *soplaron* aires positivos a nivel internacional. Con la citada crisis de por medio se acentuaría gravemente el *hecho diferencial*⁹⁰. En nada ayudó, de

dentro del dossier monográfico, *25 años de información económica*. Una actualización en torno a todos estos datos en, BETRÁN, Concha, CUBEL, Antonio, PONS, M^a Ángeles y SANCHÍS, M^a Teresa, *La España democrática (1975-2000)*. Economía, Madrid, Síntesis, 2010.

⁸⁶ Véase aquí el trabajo de, LAGARES CALVO, Manuel J., *Déficit público y crisis económica. Un análisis de la situación española*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982, con prólogo de Enrique Fuentes Quintana.

⁸⁷ Para el examen de sus consecuencias en la marcha global de la economía nos remitimos a, GONZÁLEZ CALVET, Josep, “Crisis, transición y estancamiento. La política española, 1973-1982” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., pp. 133-176.

⁸⁸ Lecturas alternativas que como denunció Fernando Esteve Mora serían secuestradas por los ‘expertos’. ESTEVE MORA, Fernando, “Crecimiento y bienestar. La economía que no está en el PIB” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política...*, op.cit., p. 267.

⁸⁹ ALBARRACÍN, Jesús, “La extracción del excedente y el proceso de acumulación” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 321. Sobre lo que se ha interpretado como el fordismo español incompleto y/o inacabado, BABIANO, José, *Emigrantes, cronómetros y...*, op.cit..

⁹⁰ Entre los datos más significativos para explicar la dimensión de la crisis cabe citar como entre 1975 y 1985, la economía española perdió con respecto a Europa –teniendo presente el diferencial previamente existente en estándares sociales y económicos– diecisiete años. Es decir, en el inicio de la recuperación que se puede datar a partir del año ochenta y cinco, en la práctica, la economía estaba en una situación similar a la del año sesenta y ocho. VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio, “La dinámica económica y reestructuración productiva en España” en MIGUÉLEZ Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones de...*, op.cit., p. 8.

igual forma, la posterior estrategia económica seguida por los gobiernos de la UCD para tratar de resolver los problemas económicos⁹¹. De nuevo, Francisco Fernández Marugán ha sido explícito: “se carecía de una estrategia capaz de dar una respuesta activa a través de la que fuera posible alcanzar una salida positiva a semejante situación”⁹². Asimismo el *tono vacilante* y la ausencia de una planificación rigurosa por parte de los ministros de economía de entonces, contribuyeron a retrasar todavía más la salida de la propia crisis.

A la par se ha de tener en cuenta que aquella falta de planificación conllevaría una serie de consecuencias para determinados sectores del mercado, y no siempre de carácter negativo. Como ha afirmado Miren Etxezarreta lo que se denominó como “«la no política económica» fue suficiente, a pesar de la crisis, para permitir importantes ventajas a algunos sectores del capital privado”. Lo que, en definitiva, vendría a resumirse como “el axioma de que no hacer política supone siempre una determinada política económica”⁹³.

Si la recesión económica española fue más dura y se extendió durante un mayor tiempo (1974-1985), se debió, además, a las “importantes dosis del consabido arbitrarismo español”⁹⁴. A lo que se sumó como los propios gobiernos centristas ante la situación de desconcierto decidieron llevar a cabo una “política compensatoria que, en esencia, consistía en sacrificar a corto plazo el sector exterior para reducir el impacto en precios, empleo y actividad interna”⁹⁵.

No será hasta la firma de los *Pactos de la Moncloa* –considerados por los economistas liberales como un claro “retorno a la ortodoxia”⁹⁶– cuando se empieza a poner algo de orden en las políticas económicas, más allá de la importancia de los mismos en la reordenación y reestructuración del sistema capitalista español. De todo este proceso de reordenación, nos interesa destacar tres aspectos claves mencionados también en el estudio de Miren Etxezarreta:

- a) En primer lugar, la característica esencial de este periodo es la *continuidad*, es decir en ningún momento se tuvo por objeto alterar los parámetros fundamentales del sistema capitalista por ninguna de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
- b) La segunda característica a destacar es la conquista de un inusual *consenso interno*, “ya que se logró la aceptación para el programa de casi la totalidad

⁹¹ Una visión desde el propio interior de los gobiernos ucedistas, GARCÍA DIEZ, Juan Antonio, *La política económica frente a la crisis*, Madrid, Ministerio de Economía y Comercio / Secretaria General Técnica, 1981.

⁹² FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 139.

⁹³ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., pp. 36-37. Como remarcaba la propia autora unas páginas más adelante, a partir de la firma de los *Pactos de la Moncloa* se comenzaría «una rápida recuperación de los excedentes empresariales». No obstante «[l]os beneficios recuperados no se dedicaron a la inversión generadora de empleo, como rezaba el discurso oficial, sino al saneamiento de las cuentas empresariales, a la colación financiera, y en menor medida, a la racionalización del aparato productivo». Ibídem, p. 45. Por lo demás, véase, primero, SEBASTIÁN GASCÓN, Carlos, “Una nota sobre la generación y utilización del excedente empresarial en la empresa privada española (1981-1984)” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, op.cit., vol. II, pp. 801-813; y segundo, AGUIRRE, José Antonio, *La política económica de la transición española, 1975-1980*, Madrid, Unión Editorial, 1981.

⁹⁴ FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 140.

⁹⁵ SERRANO SANZ, José M^a, “Crisis económica y transición política” en REDERO SAN ROMÁN, Manuel (ed.), *La transición a...*, op.cit., pp. 142-143.

⁹⁶ REQUEIJO, Jaime, “Lo que fuimos y lo que somos”, *Información Comercial Española*, nº 676/677, (1990), pp. 5-19, dentro del dossier monográfico, *Cincuenta años de economía española: 1939-1989*.

de las fuerzas sociales”. Y ello a pesar de los fuertes conflictos obreros y sociales que sacudieron a la sociedad española durante la segunda mitad de la década de los setenta.

- c) En tercer lugar, la firma de aquellos *pactos* o *acuerdos* venían a consolidar una línea de aceptación de las directrices de las instituciones internacionales como el FMI o la OCDE, que se mantendrán posteriormente en el tiempo⁹⁷.

El llamado “ajuste positivo” se constituiría en la guía central de las orientaciones en materia de política económica⁹⁸. Daba comienzo de forma irreversible el proceso de *liberalización y desregulación* en pos de la competitividad internacional⁹⁹. La *nueva lógica* del mercado se impondría sin mayores contratiempos. Por lo demás, la lógica política de la transición también impuso sus tiempos por encima de las cuestiones económicas. Incluso durante la crisis del año setenta y nueve como ha destacado Charles Powell, “la opinión pública pareció interpretar la crisis de 1979 en función de factores externos, aunque en esta ocasión sí sufrieron la popularidad y credibilidad de los gobiernos que la padecieron”¹⁰⁰. Incluso desde los sectores de izquierda tanto a nivel político, sindical y social más allá de discrepancias internas en el seno de las organizaciones –velozmente sofocadas con no pocas consecuencias¹⁰¹– se aceptaron unas medidas impensables tan sólo unos años antes. En esta situación de “inmovilismo dinámico” mucho tuvo que ver no sólo la situación de crisis generalizada a nivel institucional, sino la capacidad de penetración de la ideología dominante incluso en sectores anticapitalistas, en donde se asoció *modernización económica* con *consolidación de la democracia*¹⁰².

⁹⁷ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., pp. 38-39. Véase asimismo la obra de, MUNS, Joaquín, *Historia de las relaciones entre España y el Fondo Monetario Internacional, 1958-1982: veinticinco años de economía española*, Madrid, Alianza / Banco de España, 1985. Aquí de nuevo, téngase presente la bibliografía apuntada en la *nota 34*.

⁹⁸ Las directrices de la OCDE fueron rápidamente aceptadas por las fuerzas políticas y académicas hegemónicas del capitalismo español. Una *aceptación* también respaldada por buena parte de los economistas españoles que vieron en las propuestas de los grandes organismos internacionales la ‘única política posible’ para salida de la crisis. De la siguiente forma se despachaba un conocido editorial de *Papeles de Economía Española* en una fecha clave –téngase presente, además, que se está ante la revista económica de mayor trascendencia del país en este mismo ámbito–: «La crisis actual es una crisis de estructura productiva (la disponible en todos los países forjada en los años del desarrollo 1951-73) que no responde a los nuevos datos de nivel y estructura de la demanda, costes y precios relativos, y ventajas comparativas internacionales. Variar y actuar esa estructura productiva a los nuevos datos hace indispensable el cambio productivo. Por tanto, descartar las políticas defensivas tendentes a preservar la estructura productora disponible es la primera y fundamental exigencia de la política económica. Esta primera condición no se ha cumplido por muchos países de la OCDE, lo que ha agravado la crisis. Pero esa condición necesaria de la política económica no es suficiente para asegurar un desarrollo prolongado. Son necesarias políticas de ajuste positivo que la OCDE ha ido definiendo en distintos documentos». “Los motivos y la...”, op.cit., p. 3. Sobre los efectos de estas primeras políticas remitimos a, FLANAGAN, Robert J., SOSKICE, David W. y ULMAN, Lloyd, *Sindicalismo, estabilización económica y política de rentas: la experiencia europea*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.

⁹⁹ Términos empleados por Albrow para definir la nueva realidad en que vivimos. ALBROW, Martin, *The Global Age: State and Society Beyond Modernity*, Cambridge, Polity Press, 1996. Véase aquí el planteamiento al respecto de, CASTELLS, Manuel, *La era de...*, op.cit., vol. I, *La sociedad red*.

¹⁰⁰ POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 269.

¹⁰¹ Dos casos interrelacionados con un alto valor explicativo y simbólico son los del PCE y CCOO, respectivamente. Junto con lo citado en el Capítulo 3 en sus diferentes subapartados, véase también, ERICE, Francisco, “Estrategias, debates y divergencias en el movimiento obrero y sindical en el último franquismo” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos...*, op.cit., pp. 318-376.

¹⁰² ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 41. Lo que terminaría modificando, según la misma autora, las

Aún más, pues cuando las dudas sobre la viabilidad del proceso de transición, y con unos datos macroeconómicos alarmantes, se incrementaron de forma notable cuestionando lo realizado hasta el momento, el frustrado Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 tuvo el efecto deseado o no deseado, según lo queramos leer, de resituar dentro del “consenso” a las voces más disidentes y desequilibradoras. Un simple repaso por las medidas de corte económico que siguieron a la constitución del Gobierno de Calvo-Sotelo son lo suficientemente significativas para comprender el “éxito” del 23-F en línea con la implantación de la *nueva lógica del mercado*¹⁰³. Otro ejemplo más de “la pérdida del poder político frente a la política económica”¹⁰⁴.

La aceptación de buena parte de la izquierda política y sindical –para más detalles, la que había logrado representación institucional– de los nuevos postulados (neo)liberales, con un papel destacado por parte del socialismo español, supuso el “cambio más dramático de los últimos años” para la propia *izquierda histórica*¹⁰⁵. El sociólogo Rafael Díaz-Salazar quizás haya sido uno de los investigadores más contundentes en la crítica de la aceptación de los nuevos postulados y del consiguiente abandono de las políticas keynesianas por parte de la socialdemocracia:

«El ciclo de reestructuración del capitalismo ha conllevado una derrota política de la izquierda. El paradigma del neoliberalismo se ha impuesto. La mayor parte de los partidos socialdemócratas han abandonado las políticas de nacionalización de sectores económicos centrales y de refuerzos de las empresas públicas. La perspectiva de ir más allá del capitalismo ha desaparecido de su horizonte»¹⁰⁶.

«actitudes de ciertos grupos de poder: al constatar que la izquierda no era tan potente ni radical como se temía, la derecha endureció sus posiciones y planteó crecientes resistencias ante cualquier actuación que pareciera ir contra sus intereses». Ibídem, p. 42. Parecida fue la conclusión de James Petras: «La generación de los años 60 ha sido parcialmente ‘institucionalizada’ (profesionalizada), privatizada o incorporada al aparato burocrático». PETRAS, James, *La socialdemocracia del..., op.cit.*, p. 25.

¹⁰³ Véase, en concreto, el caso de la negociación del ANE en el apartado, “9.3.2.1. El Acuerdo Nacional de Empleo: *a vueltas con el secretismo* en torno a la contratación temporal (enero/febrero 1981-junio 1981)”.

¹⁰⁴ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del..., op.cit.*, p. 43.

¹⁰⁵ PETRAS, James, *La socialdemocracia del..., op.cit.*, p. 26. Añadiendo además: «Hay un terreno en el que el Partido Socialista español ciertamente ha conseguido el éxito: ha devaluado el socialismo, lo ha vaciado de significado, lo ha transformado en una ideología estatal legitimadora de los privilegios de la nueva clase dominante resultante de la fusión entre los profesionales en ascenso y los nuevos ricos de la banca». PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español..., op.cit.*, p. 30.

¹⁰⁶ DÍAZ-SALAZAR, Rafael, “Trabajadores precarios: el proletario del siglo XXI” en id. (ed.), *Trabajadores precarios..., op.cit.*, p. 69. Por su parte el excelente conocedor del socialismo español, Antonio García Santesmases se preguntaría a la altura de 1985 lo siguiente: «La política desarrollada por el gobierno renuncia a los principales objetivos socialistas. Es una política que ha ido arrojando por la borda todas las ideas molestas o ‘peligrosas’ [...]. Muchos pueden pensar que la política realizada es la única posible. Si ello fuera así aún a pesar de todo cabe preguntarse: ¿son la economía de mercado y la OTAN el único modelo de sociedad posible? ¿la única política viable es la que santifica las actuales relaciones de producción y la que respecta las estructuras internacionales de poder?». Y concluía: «[P]ero la asunción de esas realidades y la subsunción dentro de esos procesos por un gobierno socialista puede hacer pensar a la mayoría que el socialismo es compatible con tal sistema económico o que da por buena tal situación internacional». GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “El bienio socialista en perspectiva. Evolución ideológica del socialismo en la España actual” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista..., op.cit.*, p. 44.

6.1.4. Los márgenes de actuación de los partidos socialdemócratas. El caso del *socialismo español*

La crisis económica de los setenta marcaría un punto de inflexión en todos los sentidos. En modo alguno, se está exagerando el impacto de aquella crisis. El triunfante *nuevo reino del mercado* afectaría a los tradicionales postulados socialdemócratas. Inclusive el no en pocas ocasiones mitificado modelo socialdemócrata en los países del Norte de Europa, cuya sola evocación sigue constituyendo la referencia por antonomasia para los partidos socialistas, se quedaría en eso: en un marco de evocación simbólico¹⁰⁷.

Superada la situación inicial de desconcierto y asumido el papel dominante del mercado, la aceleración de los *tempos* de la mundialización de la economía internacional, trastocaría paulatinamente los postulados centrales de las socialdemocracias del Norte y el Sur de Europa. Y ello a pesar –como acabamos de indicar– de que en la memoria colectiva de casi tres generaciones de trabajadores europeos –de forma mayoritaria– el impacto de las políticas socialdemócratas desde finales de la década de los cuarenta hasta principios de los setenta del siglo XX, hayan quedado marcadas como el horizonte deseable hacia donde caminar¹⁰⁸.

En esta tesitura, los marcos de actuación en torno a las posibles estrategias macroeconómicas de los partidos socialistas, a nivel nacional, se verían condicionados por unas nuevas realidades internacionales. Lo cual daría lugar a no pocos novedosos interrogantes. Interrogantes que como ha explicado el profesor de la Universidad de Princeton, Carles Boix, pueden resumirse de la siguiente manera:

«¿Han sido, y son, los partidos políticos, entendidos como coaliciones de intereses e ideas, realmente capaces de promover sus programas electorales? [...] ¿Afectan a la economía y a las políticas para gobernarla y transformarla? En particular, ¿qué grado de responsabilidad cabe atribuirles, cuando menos parcialmente, en la evolución del desempleo, de la actividad económica y de la distribución de la renta? En caso afirmativo, ¿qué estrategias específicas emplean? ¿Por qué preferencias e intereses se inclinan? ¿Y, sobre todo, a qué dilemas redistributivos se enfrentan?»¹⁰⁹.

Preguntas que devienen en centrales para entender y explicar no pocas claves de la política económica emprendida por el primer Gobierno socialista. Si hasta el momento nos hemos detenido en los condicionantes internos y externos al propio socialismo español, en lo que respecta a su progresiva moderación y materialismo político-económico; toca ahora interrogarse por cómo afectó la llegada de la ola neoliberal con la consiguiente aceptación de la *nueva lógica* del mercado en el diseño de las políticas a desarrollar¹¹⁰.

De esta forma, por lo menos, deben partirse de las siguientes premisas interpretativas. Frente a la idea de estabilidad a medio y largo plazo anterior a la crisis económica, el nuevo capitalismo globalizado estaría caracterizado, en adelante, por el predominio de la inestabilidad

¹⁰⁷ Véase el planteamiento de fondo ya citado por quien fuera el presidente de la Fundación Pablo Iglesias en su día, PARAMIO, Ludolfo, *La socialdemocracia...*, *op.cit.*.

¹⁰⁸ Interesante, en este sentido, las siempre agudas reflexiones de, NAVARRO, Vicenç, “La economía política del Estado del Bienestar”, *Sistema*, nº 148, (1999), pp. 3-55.

¹⁰⁹ BOIX, Carles, *Partidos políticos, crecimiento...*, *op.cit.*, p. 22. Del mismo autor, id., “El gobierno de la economía: naturaleza y determinante de la política económica en España” en GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), *Políticas públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno*, Barcelona, Ariel, 1998, pp. 39-54. En todo caso, la obra de referencia, y sobre la que en otros apartados se apuntarán un conjunto de valoraciones, es la de, SHARE, Donald, *Dilemmas of Social...*, *op.cit.*; y en esta misma línea, ROYO, Sebastián, *From social democracy...*, *op.cit.*. Todo ello junto con, AGUIAR, Fernando, “The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) 1879-1988. From republican to liberal socialism”, *Documento de Trabajo. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía*, nº 1906, (2006).

¹¹⁰ Una valiosa visión de conjunto en, RECIO, Albert y ROCA, Jordi, “The Spanish Socialist in Power: Thirteen Years of Economic Policy” en GLYN, Andrew (ed.), *Social Democracy in...*, *op.cit.*.

y por las constantes incertidumbres. Fin del modelo de seguridad económica. Pero no sólo pues, “no se ha consolidado un nuevo esquema de acumulación que parezca asegurar, o por lo menos facilitar, la estabilidad en el crecimiento en un período relativamente prolongado”¹¹¹. Prueba palpable de lo dicho han sido las sucesivas crisis mundiales del citado modelo, a principios de los noventa o sin ir más lejos la crisis estructural de la primera década del siglo XXI¹¹².

Dicho lo anterior, y de cara a situar en términos históricos los principales parámetros por donde transcurrieron las políticas económicas de los gobiernos socialistas, conviene destacar un pequeño conjunto de *otros* factores condicionantes de las mismas. Primero, se ha de tener presente los factores *estructurales* e *institucionales* en los que los partidos elaboran sus estrategias políticas y económicas, y que, en suma, determinan y limitan en gran medida el rumbo a elegir. En segundo lugar, los partidos gobernantes a principios de los años ochenta se encontraron con el conocido *trade-off* entre inflación y empleo. Y en tercer lugar, y siguiendo de nuevo el análisis de Carles Boix, los partidos políticos elaboran sus “estrategias competitivas” en las que deciden sus prioridades no sólo en relación con los contextos en que se desarrollan, sino en “su condición de organizadores de amplias coaliciones de intereses e ideas, [que] desempeña [...] un papel clave en el proceso de formulación de la política económica”¹¹³.

Asumidas las nuevas reglas del mercado, y por tanto, la preponderancia en sí misma del crecimiento económico como paso teórico previo para una “futura” distribución de la riqueza, el citado fin se trastocaría en prioridad absoluta de los partidos tanto conservadores como socialdemócratas en este tiempo histórico en el que nos movemos. Pero claro está que tanto en un nivel teórico como programático existieron diferencias entre ambas posiciones políticas, aunque los posibles márgenes de actuación –y añadiríamos de diferenciación– fueran reduciéndose de forma progresiva. ¿Dónde residieron las citadas diferencias? Precisamente, sin salirnos del terreno teórico cuando no ideológico, en el principio de redistribución, de crecimiento y de fortalecimiento del estado del Bienestar. En lo que nos interesa, el dilema que tuvieron que afrontar los partidos socialdemócratas, especialmente los del Sur de Europa, sería el siguiente: crecimiento vs igualdad¹¹⁴.

¹¹¹ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 35.

¹¹² Agudas reflexiones sobre la crisis de principios del siglo XXI así como con respecto a las acaecidas durante los últimos cincuenta años, todo ello desde una perspectiva eminentemente crítica en, TOUSSAINT, Eric, *La crisis global: perspectivas y alternativas*, Madrid, Popular, 2009; GIRÓN GONZÁLEZ, Alicia, RODRÍGUEZ LÓPEZ, Patricia y DÉNIZ ESPINÓS, José (coords.), *Crisis financiera: nuevas manías, viejos pánicos*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2010; AMIN, Samir [et al.], *Crisis financiera, económica, sistémica*, Madrid, Maia, 2010; RAMONET, Ignacio, *La catástrofe perfecta: crisis de siglo y refundación del porvenir*, Madrid, Público, 2010; o, SOTELO, Adrián, *Crisis capitalista y desmedida del valor, un enfoque desde los Grundrisse*, México, Itaca / Facultad de Ciencias Políticas-UNAM, 2010. Y asimismo la más que recomendable obra de, MARTÍN SECO, Juan Francisco, *La trastienda de la crisis. Lo que el poder económico quiere ocultar*, Barcelona, Península, 2010. Desde otros postulados, KRUGMAN, Paul R., *El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual*, 2ª ed., Barcelona, Crítica, 2009; STIGLITZ, Joseph E., *Caída libre: el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial*, Madrid, Taurus, 2010; SEVILLA SEGURA, Jordi, *¿Mercado o Estado? Dos visiones sobre la crisis*, Barcelona, Deusto, 2010. Desde una perspectiva sociológica, GIL CALVO, Enrique, *Crisis crónica: la construcción social de la gran recesión*, Madrid, Alianza, 2009. Y desde lo histórico, BERNECKER, Walter L., ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ, Diego y MAIHOLD, Günther (eds.), *¿Crisis? ¿Qué crisis? España en busca de su camino*, Madrid, Iberoamericana / Frankfurt am Main / Vervuert, 2009, y en concreto el trabajo de, ESTRADA, Ángel, “Crisis y factores estructurales en España” (pp. 111-132).

¹¹³ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, op.cit., p. 24.

¹¹⁴ Este dilema (*trade-off*) sería explicado por uno de los principales responsables de la política económica y laboral del Gobierno socialista con no pocos matices de notables interés. Un ángulo de análisis –en una conocida obra del entorno socialista– que viene a recoger, en suma, varias de las ideas realmente existentes en el seno del socialismo sobre la dirección que había tomado la estrategia de la modernización: «La batalla ideológica entre el socialismo democrático y las ideas conservadoras y

Otro asunto muy diferente, más allá de las cuestiones programáticas e inclusive de las buenas intenciones políticas –la siempre mencionada “voluntad política”– fue la realidad socioeconómica en donde tuvieron que emprender las políticas de carácter supuestamente socialdemócratas a nivel europeo. La *obsesión* por mantener a toda costa una *inflación baja* condicionaría, en buena medida, el resto de objetivos políticos y económicos. Ahí es cuando entra la conocida teoría de la *curva de Philips* que, irremediablemente, conllevará un alto nivel de desempleo más allá de los ciclos económicos¹¹⁵. Aunque todavía este no es lugar para entrar en mayores detalles técnicos, lo que en el fondo y superficie sucederá es que las políticas económicas de los partidos socialdemócratas se van a ver, ampliamente, limitadas por factores externos, siendo incapaces, de hecho, de modificar el rumbo de ciclo económico. En resumen, la sucesión de todo un conjunto de *círculos viciosos*, terminarían por *finiquitar* las posibilidades reales de llevar a cabo políticas socialdemócratas a la *vieja usanza* en este concreto marco explicitado¹¹⁶.

6.2. La «salida progresista» a la crisis¹¹⁷

«Nos parece que quizá a los socialistas, hoy en el poder, nos ha tocado jugar un papel histórico de modernización de estructuras, consolidación de las formas democráticas e integración en el mundo desarrollado, que seguramente no debiera habernos correspondido. Estas tareas han sido desarrolladas en otros países por movimientos políticos que no pertenecían a la izquierda; que no tenían carácter socialista. Ocurre que, seguramente, no se pueda realizar otro tipo de acción socialista de gobierno sin procurar antes una consolidación, desarrollo y modernización de nuestro país, y nos parece un hecho

liberales se ha desarrollado en este terreno en la alternativa entre la equidad y la eficiencia. Desde los supuestos conservadores la intervención de los poderes públicos a la búsqueda de una distribución concreta –con mayor o menor concentración de la renta respecto a una situación precedente– compromete la eficiencia de la economía en la asignación de recursos, que en otro caso, lograría incluso mejores resultados en términos de distribución dejada a su libre albedrío. Pero incluso para quienes una mayor igualdad en la distribución de la renta no constituye un imperativo moral, no se alcanzan a ver las ventajas que en cualquier orden se pueden derivar de una distribución más desigual, si aparece garantizada la maximación de la eficiencia». MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-equidad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., pp. 197-198. De similar interés y de cara a observar los planteamientos socialistas en relación al citado *trade-off* y la construcción del Estado del Bienestar, tanto desde un punto de vista ideológico como de la praxis, resultó el dossier monográfico de la revista *Sistema*, nº 80-81, (1987), titulado *Estado del Bienestar y opciones de política económica*, en donde sobresalen necesariamente los siguientes textos: ZAPATERO, Virgilio, “Tres visiones sobre el Estado del Bienestar” (pp. 23-38); MUÑIZ, Miguel, “Opciones de política...”, op.cit.; TEZANOS, José Félix, “El sentido político...”, op.cit..

¹¹⁵ Véase la nota 41.

¹¹⁶ Desde una perspectiva socialdemócrata de *orientación liberal*, tal como ha explicado Carles Boix, la solución a estos problemas se resolvería de la siguiente forma: «A fin de incrementar la igualdad sin sacrificar el crecimiento, los gobiernos socialdemócratas intensifican el gasto público (directo o por medio de empresas estatales) en capital fijo y humano con el objetivo de incrementar la productividad de todos los sectores económicos y, en particular, la productividad de los sectores económicos, y en particular, la productividad de los trabajadores y regiones menos privilegiadas. Esto se traducirá a su vez en salarios más elevados y permitirán aumentar los impuestos más altos para financiar (sin amenazar la tasa de crecimiento) políticas sociales extensas». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, op.cit., p. 196.

¹¹⁷ Terminado empleado de forma mayoritaria y general tanto por el Gobierno como el PSOE durante todos estos años. Entre las primeras concreciones serias, o mejor dicho fundamentadas, en torno a esta expresión –muy relevadora, por otra parte, del lenguaje y cultura política del nuevo socialismo español ahora en el poder– véase, AHFFLC, PSOE-CEF, “Documento de estrategia”, octubre de 1983, sig. AI-647-08, p. 24. Otro ejemplo en, DORADO, Roberto, “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit..

evidente que, afortunada o desafortunadamente, esta política actual del Gobierno –que seguramente es la única política que responsablemente se puede hacer– genera descontentos en una parte importante de los sectores dinámicos, entre los que se encuentra una gran masa de jóvenes que resultan más inconformistas y pretenden que las reformas se vayan produciendo con mayor celeridad y mayor profundidad».

Javier de PAZ, Secretario General de la JSE¹¹⁸.

Se indicaba en el programa electoral *Por el cambio* una cuestión que, en breve, devendría en central: “existen márgenes de maniobra no despreciables dentro de la coyuntura económica para ir modernizando nuestros aparatos productivos, reavivar la actividad económica y generar en cuatro años un paquete importante de nuevos puestos de trabajo”¹¹⁹. Con todas sus dudas aquel análisis no sólo evidenciaba el probado realismo programático socialista, sino que se constituía en una clara advertencia sobre las limitaciones reales de cualquier ejecutivo occidental, socialista o no, a la hora de desarrollar políticas autónomas por aquellas alturas. Más pronto o más tarde, sobre el cumplimiento y/o su incumplimiento, del *programa electoral* se concentrarían no pocas críticas sobre el devenir del Gobierno socialista¹²⁰. Aquel siempre recordado *programa* de *Por el cambio* se entendería, por parte de no pocos sectores ciudadanos, con una especie de *contrato social* cuyo temprano y sistemático incumplimiento, terminaría por generar un creciente desapego tanto en relación al ejecutivo socialista como a la política, ya en términos más generales.

La aceptación del mercado como el ámbito natural en el que se desenvolvería la estrategia socialista, junto con la configuración de su proyecto modernizador –aunque todavía no se alcanzará a vislumbrar el grado de “liberal” de los gobiernos socialistas– permitió reajustar ciertas promesas electorales en un tiempo relativamente corto¹²¹. Dejada para un futuro que, en todo caso, no se avecinaba cercano aquello de la *redistribución de la riqueza*, ahora los

¹¹⁸ PAZ, Javier de, “La juventud de los años 80” en PSOE-CEF-Secretaría de Participación Ciudadana, *Un proyecto de futuro para la juventud. Conferencia socialista: Madrid, 12, 13, 14 diciembre 1985*, Madrid, PSOE / Secretaría de Participación Ciudadana, 1985, p. 86.

¹¹⁹ PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 6. Una vez en el Gobierno los juicios valorativos e interpretativos se modificaron profunda y rápidamente. Miguel Boyer, principal promotor de aquello de la “única política posible” se encargaría de clarificarlo a los 100 días de la constitución del primer Gobierno socialista: «Cualquier Gobierno español tendría que afrontar en términos bastante parecidos los objetivos macroeconómicos. Porque, aunque nosotros insistamos más en el paro, la política macroeconómica deja poco margen en la situación muy deteriorada de la economía española». Entrevista en, PSOE, *Hacia el cambio...*, *op.cit.*, p. 120. Un año aproximadamente después el propio Ministro de Economía no eran tan optimista: «Una política económica que permite pocos márgenes de maniobra, dada la delicada situación de partida». BOYER, Miguel, “Por la solidaridad hacia la salida de la crisis” en PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *Un año para...*, *op.cit.*, p. 122. Una crítica a esta obra citada en, CLARET, Andreu, “¿Hacia dónde va el Gobierno PSOE?” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 51.

¹²⁰ Nos remitimos aquí a la acertada lectura que en su día Andreu Claret expresará claramente: «El grado de cumplimiento o incumplimiento [...] sería así lo que permitiría hablar de acierto o desacierto en la política socialista. Creo que este enfoque, en el que hemos caído también en él desde la propia oposición, lleva a una visión parcial y, en definitiva, a relativizar tanto las críticas como los elogios a la política del gobierno. Se trata de un enfoque que, desde mi punto de vista, debemos superar en la medida en que impide juzgar el todo, juzgar el significado real, el movimiento real de la política del gobierno y su influencia en la configuración del nuevo período histórico iniciado en 1977; en definitiva, su influencia en la configuración del modelo de democracia que se está construyendo en España». *Ibidem*, p. 51.

¹²¹ Más pronto o más tarde la justificación de esta opción se convertiría en una constante por parte de destacados dirigentes socialistas. Aunque no siempre de forma clara o sin contradicciones. A modo de ejemplo, la de José M^a Benegas: «Se puede aceptar el mercado como instrumento de asignación de recursos y, al mismo tiempo, no compartir los valores de la civilización capitalista o, al menos, no todos ellos». BENEGAS, José M^a, *El socialismo de lo pequeño. Grandeza y humildad de un ideal*, Madrid, Temas de Hoy, 1997, p. 47.

socialistas en el poder adaptarán rápidamente sus líneas de actuación al paradigma económico dominante con el apoyo cada vez más decidido de la comunidad científica dentro del calificado “nuevo consenso teórico” entre los economistas españoles¹²². Como destacara tempranamente James Petras, “las corrientes intelectuales más influyentes en los círculos gobernantes socialistas se han hecho con el terreno político antes dominado por fuerzas centristas-liberales”¹²³. Todo ello ante la “evidencia”, según el *canon liberal*, de que los dentro del Gobierno y del Partido los que se opusieron al “objetivo de una política macroeconómica estable [...] no fueron capaces de presentar una alternativa política creíble y, desde un punto de vista técnico, rigurosa”¹²⁴.

En términos históricos, el momento de la toma de decisión por la “salida liberal” en el terreno económico por el primer Gobierno socialista¹²⁵ se produciría sin grandes tensiones, ni enfrentamientos, y como destacó Carlos Solchaga sin prácticamente debate alguno:

«Tom Burns: Es a usted, junto con Miguel Boyer, a quien le toca implementar una política de ajuste nada más llegar al poder. Tenían la ventaja del ejemplo francés, pero aún así debió de ser duro el debate previo a la toma de determinadas decisiones que poco tenían que ver con la política expansiva que muchos esperaban del PSOE.

Carlos Solchaga: El debate nunca fue absolutamente explícito, pero también es verdad que se veían las dos tendencias»¹²⁶.

¹²² BOIX, Carles, *Partidos políticos, crecimiento...*, *op.cit.*, p. 148. Por esta misma vía de interpretación, el propio autor explica la progresiva aceptación por parte de los propios dirigentes y técnicos de los gobiernos socialistas del nuevo *consenso académico*: «La comunidad académica española, y, como consecuencia, la mayor parte de la élite política, aceptó progresivamente que el persistente estado crítico de la economía española durante la última década derivaba de factores estructurales que no podía solucionarse simplemente expandiendo la demanda interna». Un debate académico, por continuar con las tesis del autor, que una vez constatada y tipificada la *crisis* como *estructural* achacaba al «fuerte crecimiento de los salarios reales» el haber «puesto en peligro los beneficios empresariales, y por tanto, la creación de empleo neto». *Ibidem*. De especial importancia resulta la lectura de obra de, SERRANO SANZ, José M^a y COSTAS, Antonio, *Ideas y políticas...*, *op.cit.*; así como la de, VIVES TORRENTS, Xavier, “La investigación en economía en España en las dos últimas décadas” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, *op.cit.*, vol. VIII, pp. 993-1004. Otro trabajo relevante en ese campo en, SÁNCHEZ LISSEN, Rocío, *Los economistas de la “Escuela de Madrid”*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2007.

¹²³ PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, *op.cit.*, pp. 41-42.

¹²⁴ BOIX, Carles, *Partidos políticos, crecimiento...*, *op.cit.*, p. 150. Un argumento de ‘enorme calado científico’ que, no obstante, ha hecho mella en no pocos sectores económicos y políticos: «Para que se elija el ajuste hace falta, además, que las autoridades estén convencidas de que vale la pena asumir los costes que necesariamente acarrea esta política; en otras palabras, que piensen que no hay alternativa racional [...]. Con estos antecedentes y a la vista de los graves desequilibrios que presentaba la economía nacional, el gobierno socialista no sólo eligió en 1982 la estrategia de ajuste sino que la desarrolló con cierta energía». SERRANO SANZ, José M^a, “La economía durante la transición y consolidación de la democracia” en RAMOS GASCÓN Antonio (ed.), *España Hoy...*, *op.cit.*, vol. I, p. 125. Nos remitimos aquí una vez más a lo explicado en el Capítulo “5. Gabinetes «tecnocráticos» y «liberales» para los nuevos tiempos”.

¹²⁵ Tesis principal negada por el principal protagonista, pues para Miguel Boyer difícilmente se podía identificar aquella decidida ‘política solidaria’ con cualquier intento de ‘liberalismo’: «Nosotros pensamos que todo eso conduciría a una salida liberal de la crisis que, a más de no haberse mostrado operativa en otros países, en las circunstancias concretas españolas, con unas injusticias tremendas con un sufrimiento ya considerable, en cuanto a paro, desigualdad social, etcétera, es políticamente inadmisibles». Entrevista en, PSOE, *Hacia el cambio...*, *op.cit.*, p. 121.

¹²⁶ Entrevista de Carlos Solchaga en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 149. Sobre las ‘tendencias’ que se citan, el interesado indicaría lo siguiente: «Había discrepancias, particularmente por parte de Enrique Barón, el ministro de Transportes de la época, y también por parte del ministro de Sanidad, Ernest Lluch, a quien le hubiera gustado más ocupar mi puesto de Ministro de Industria, y, con frecuencia, del Ministro de Obras Públicas, Julián Campo, todos los cuales, a su vez, se

Antes de la primera reunión del Consejo de Ministros ya estaba trazado el *único camino posible*, la *única política posible*, la que con el paso del tiempo se denominaría eufemísticamente como la “necesidad impostergable de la política económica aplicada por el Gobierno socialista”¹²⁷. Se estaba en el momento preciso de lo que Alfred E. Kahn llamaría la “tiranía de las pequeñas decisiones”¹²⁸.

Es precisamente en esos meses de intervalo entre octubre a diciembre de 1982 cuando Felipe González, con el asesoramiento de los economistas del PSOE, con Boyer al frente, se va diseñando el futuro más cercano¹²⁹. Otros protagonistas bien informados han llegado a señalar que a la altura de septiembre de 1982, es decir, antes de las elecciones generales, se tenía claro que las políticas expansionistas expuestas en el programa electoral serían inviables en aquella coyuntura¹³⁰. Lo anterior siempre al margen de la organización quien, no obstante, en instante

aproximaban al sector de Guerra [...]. Poco a poco se van formando grupos dentro del sector económico. Joaquín Almunia, Miguel Boyer y yo, en una línea mucho más ortodoxa, estábamos convencidos de que había que ir hacia liberalizaciones y desregulaciones». Ibídem, p. 155. Por lo demás, las ‘etiquetas’ de cada uno de los *bandos* discrepantes varían según el testimonio que se consulté: si Solchaga y Boyer hablarían del ‘ala derecha’ e inclusive ‘socialdemócratas liberales’; Alfonso Guerra por su parte no dudaría en señalar: «Es que hay un sector del partido, un sector social liberal, o como se quiera llamar, los que forman los enemigos de los sindicatos. Este sector lo que quiere es liquidar los sindicatos, mientras que otros estamos en otras posiciones y no queremos eso para nada». Declaraciones en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 137. Y por último, Joaquín Almunia, otro de los grandes protagonistas, siempre ha evitado etiquetarse al lado de Solchaga y Boyer –sus motivos tendría– empleando el término *renovador* aunque defendiendo en la práctica las mismas políticas que los sucesivos ministros de Economía: «El *renovador*, se supone, es alguien que entiende la necesidad de adaptar la estrategia, las propuestas y la reflexión política en un entorno cambiante y que no admite que se le siga dirigiendo con el mismo discurso político [...]. Pues, por ejemplo, que hay que saber articular mejor las propuestas de la socialdemocracia con el mercado, que hay que reducir el déficit, que hay que controlar la inflación, que hay que adaptar el Estado del bienestar». En declaraciones a, ibídem, p. 329.

¹²⁷ PSOE, *Cuatro años cumplidos...*, *op.cit.*, p. 16. Como criticará duramente Andreu Claret: «[S]ino que se está ante una política que intenta presentarse ante la sociedad, no sólo como la política de lo posible, sino como la política de lo necesario, acompañada de toda una serie de afirmaciones, como aquella de que ‘el capitalismo es el menos malo de los sistemas’, y otras, que intentan justificar y legitimar ese tipo de política». CLARET, Andreu, “¿Hacia dónde va el Gobierno PSOE?” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 54.

¹²⁸ KAHN, Alfred E., “The Tyranny of Small of Decisions: Market Failures, Imperfections and the Limits of Economics Discourse”, *Kyklos*, vol. XIX, (1966), pp. 23-47.

¹²⁹ «Bueno, no había una convicción real de que era la política adecuada, pero no hubo discrepancias en la medida en que estaba absolutamente detrás de esta política el presidente del Gobierno. Había una enorme disciplina porque Felipe había elegido esa política que era la que sugería Miguel Boyer y la que yo respaldaba». Declaraciones de Carlos Solchaga en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, pp. 154-155.

¹³⁰ Véase la aportación de, MARAVALL, José M^a, “Politics and Policy: Economic Reforms in Southern Europe” en PEREIRA, Luis Carlos, id. y PRZEWORSKI, Adam, *Economic Reforms in...*, *op.cit.*. Otra cuestión totalmente diferente es que *a posteriori* no pocos destacados dirigentes socialistas interiorizaran estos episodios centrales del inicio del Gobierno socialista, como unos acontecimientos sin fisuras, sin líneas de ruptura, en resumen, como algo *natural*, dando por válidos, por este camino, la elección liberal como la ‘única política posible’. Toda una reescritura de la historia que consciente o inconscientemente –ahí está, qué duda cabe, la clave interpretativa principal– ha tendido de forma manifiesta a alterar determinados acontecimientos y determinadas tomas de posturas personales en los principales momentos decisorios de la época socialista. Un excelente ejemplo en, FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 149. Por su parte, la mayor crítica que podemos encontrar dentro del equipo dirigente es nuevamente la del propio José M^a Maravall cuando afirmaba muchos años después: «Las políticas económicas desagradaban tanto al partido como al electorado». MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, p. 58.

alguno se opuso, por lo menos públicamente, a la dirección de la política gubernamental¹³¹. Una primera muestra que la política se iba a hacer desde el Gobierno y no desde el Partido¹³². No sin costes, pues progresivamente se abriría en el seno del Consejo de Ministros dos tendencias – hablar de “bandos” sería excesivo en aquel mismo tiempo¹³³ – hasta su posterior enconamiento años después¹³⁴.

«Tom Burns: [...] Yo entiendo muy bien que no hubo otra opción, pero ¿fue difícil convencer al partido de la necesidad de guardar las esencias socialistas?

Carlos Solchaga: Pues costó bastante, porque insisto en que gran parte de esta discusión no fue explícita. Son más bien tomas de decisiones que van calando en el ánimo de Felipe González, de manera que el primer énfasis que pone el Gobierno al constituirse es más bien en determinadas medidas de oferta pasando por la reconversión industrial y en el restablecimiento de la competitividad mediante la devaluación»¹³⁵.

A raíz de estos puntos de partida sería cuando los márgenes de actuación de una por sí descafeinada política socialdemócrata, interpretada a posteriori como “reformismo socialdemócrata”¹³⁶ o directamente como “socialdemocracia modernizante”¹³⁷ se ampliarán de forma considerable, como señalaría en su momento Joaquín Almunia:

¹³¹ Un ejemplo harto significativo en, AHFPI, PSOE, “El Gobierno ante la crisis económica. Explicación de la política económica e industrial de los socialistas”, Madrid, abril de 1984, Fc 381. Documento que, a buen seguro, se puede considerar como uno de los textos partidistas más aclaratorios de la primera legislatura. En la introducción se remarcaba lo siguiente en unos términos muy concretos, a modo de *correa de transmisión*: «El Partido tiene que asumir activamente el papel que tiene que desempeñar llevando y explicando a la sociedad la política, en este caso económica, desarrollada por el Gobierno. En otras palabras, tiene que actuar como elemento de conexión entre un gobierno, emanado de sí mismo, y la sociedad, de la que también emana, llegando incluso a los más finos vasos capilares de ésta». *Ibíd.*, p. III.

¹³² Una visión desde el mismo seno del socialismo aunque con falso distanciamiento en, SOTELO, Ignacio, *Los socialistas en...*, *op.cit.*, en concreto, el tercer epígrafe: “La experiencia del poder: del entusiasmo a la desilusión” (pp. 176-185).

¹³³ Cómo destacaría en 1986 Antonio García Santesmases: «El comienzo del debate pasa a mi juicio, por reconocer que, efectivamente, las posiciones socialdemócratas nunca serán las hegemónicas porque, por el camino que vamos, las posturas liberal-capitalistas que no están precisamente en minoría en el seno del gobierno, no van a ser desplazadas». GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “El bienio socialista en perspectiva. Evolución ideológica del socialismo en la España actual” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 46.

¹³⁴ No pocos autores han hablado de un «alejamiento radical» entre Partido y Gobierno, aunque sin fundamentar tal afirmación en fuentes ni en otros tipos de aportaciones. TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 25.

¹³⁵ Entrevista de Carlos Solchaga en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 150.

¹³⁶ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia...”, *op.cit.*. Señalaría en el citado trabajo: «Este ambiguo términos de ‘modernización’ se refería, fundamentalmente, a la recuperación de los atrasos en todos los órdenes con Europa Occidental, la obsesión del reformismo español desde el siglo XIX». *Ibíd.*, p. 52 [véase también lo apuntado en su día por James Petras en la *nota* 58]. En tiempos no muy lejanos el propio autor había hablado del *socialismo como reformismo radical* a partir de cual vendría a plantear una visión socialdemócrata con tintes ortodoxos. *Id.*, *La política de la transición...*, *op.cit.*, pp. 261-277. Asimismo, en esta línea, véase, *id.*, “Las razones del reformismo: Democracia y política social”, *Leviatán*, n^o 35, (1989), pp. 27-50. Una crítica un tanto superficial sobre todos estos planteamientos en, GARCÍA DURÁN, Raúl, “La lucha de clases: pragmatismo ¿para quién?” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, pp. 439-440. Por otro lado, véase también la crítica, ahora sí, más fundamentada de, ELORZA, Antonio, “Las raíces del «fenómeno socialista»” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, pp. 64-ss.

¹³⁷ RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El Gobierno imposible...*, *op.cit.*, p. 42.

«Después de un largo y doloroso paréntesis de más de cuarenta años, la izquierda llegaba al poder en unas condiciones inéditas. El PSOE recibía una responsabilidad abrumadora, aún mayor que las que había asumido en otras épocas de su historia; pero también disponía de un amplio margen de maniobra»¹³⁸.

Esta paulatina transformación se sumará a la larga lista de éxitos, más o menos *camuflados* de la estrategia de consolidación del poder político por parte de los socialistas. Si se quiere dar un paso, más debe afirmarse claramente que la aceptación de la *receta liberal* para la salida de la crisis, con el neo o no como prefijo, se constituyó en el aspecto que con mayor precisión se llevó adelante. Otra cuestión fueron, y aquí su aliado sindical –la UGT– no le faltaron argumentos para sentirse “traicionado”, las formas, el grado y sobre todo la demora en desarrollar los elementos sociales y progresistas de su programa.

Más allá del grado de satisfacción que entre la dirigencia y militancia se alcanzara ante las políticas adoptadas para superar el *manifiesto destino* del país, los gobiernos socialistas asumieron sin matices en la práctica la *responsabilidad de reestructurar el capitalismo español*. Por más que, postreramente, no hayan dejado de insistir en cómo el PSOE afrontaría una “versión particular del típico reto de la socialdemocracia en la década de los ochenta”¹³⁹. En eso consistió la *revolución burguesa pendiente*, en donde los gobiernos centristas de la UCD no tuvieron los apoyos necesarios ni contaron con los márgenes de actuación posibles¹⁴⁰. Se iniciaba, pues, la reestructuración del modelo de acumulación condicionado, en todo momento, por la posición de España dentro de la división internacional del trabajo, y que respondía, en suma, a su conversión “desde zonas de baja rentabilidad a las de alta”¹⁴¹.

6.2.1. Los tres pilares de la *lógica de la estrategia de la modernización socialista*

«¿Hay necesariamente que elegir? ¿Podría España encontrar un modelo de desarrollo que no proyecte linealmente las etapas de la experiencia europea sino que consiga dar un ‘salto de rana’ para alcanzar la situación de desarrollo multidimensional y sostenible, característica de las sociedades más avanzadas?».

¹³⁸ ALMUNIA, Joaquín, *Memoria políticas...*, *op.cit.*, p. 137. Opinión compartida también por el principal órgano de gobierno entre congresos del PSOE, en el que quizás sea uno otro de los documentos más relevantes que, por el momento, se pueden consultar: «Es evidente que, en la situación actual, la política económica que el Gobierno está desarrollando presenta un estrecho margen de maniobra por los efectos sociales inmediatos que produce. La política económica del Gobierno está proyectada para proporcionar una salida a la crisis económica a medio y largo plazo, pero exige a corto plazo determinadas medidas que de hecho resultan impopulares». AHFFLC, PSOE-CEF, “Documento de estrategia”, octubre de 1983, sig. AI-647-08 pp. 23-24.

¹³⁹ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia...”, *op.cit.*, p. 61.

¹⁴⁰ Sobre las dimensiones en términos económicos de la crisis consúltese el informe del, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMERCIO, *Crisis y reforma de la economía española, 1979/82*, Madrid, Ministerio de Economía y Comercio / Secretaria General Técnica, 1982. Allí se recompila una ingente cantidad de artículos publicados por la revista *Información Comercial Española* (ICE), dependiente del entonces citado Ministerio de Economía y Comercio. Texto por texto puede seguirse, en gran medida, los diferentes caminos así como los contra-caminos ensayados por los gobiernos de la UCD en su *lucha* contra la crisis económica, además de una infinidad de datos ‘oficiales’ que allí se aportan.

¹⁴¹ PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, *op.cit.*, p. 40. Por su parte Joaquín Arriola y Luciano Vasapollo destacaron el carácter eminentemente conflictivo de esta división internacional: «En Europa y en el resto del mundo existe un conflicto muy fuerte por la disputa en torno a las áreas de influencia capitalista. Conflicto que aparentemente no es armado, pero que quizás sea más fuerte que un conflicto bélico, porque es una guerra económico-financiera [...]. En el interior de este conflicto se redefinen tanto los roles y modelos del capitalismo como los roles y modelos de empresa». ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, *op.cit.*, p. 21.

Carlos Alonso ZALDÍVAR y Manuel CASTELLS, *España, fin de siglo*¹⁴².

No han sido pocas las voces críticas sobre la gestión de los socialistas, aunque las mismas hayan terminado ocupando un lugar preferiblemente secundario a la hora de narrar estos años. Si ya resulta harto difícil encontrar planteamientos que introdujeran el matiz de *liberal* y/o *neoliberal* para caracterizar la dirección de la estrategia de la modernización socialista –he aquí uno de esos grandes consensos (historiográficos o no) que no se suelen explicitar de forma concreta, pero que determinan, previamente, cualquier posible análisis– aún han sido menos frecuentes aquellas interpretaciones que hayan ligado dichas políticas económicas con la estructura de las “clases de poder” del país. Así pues, y sin salirnos del ámbito historiográfico, los escasos investigadores que se han internado por este periodo han tendido mayoritariamente a *glosar* cuando no a *mitificar* los gobiernos socialistas con pocos elementos críticos, y todavía menos aparato científico¹⁴³.

Realizada esta pertinente observación de partida, si otra *idea-fuerza* ha predominado sobre la propia política económica del PSOE fue su supuesta “prudencia” y “moderación” junto con su carácter técnico¹⁴⁴. Los ideólogos y estrategias del PSOE han ido un paso más lejos. El

¹⁴² ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*, p. 56. En el citado informe para el Gabinete de Presidencia del Gobierno, si una nota era característica del mismo sería su tono claramente ‘optimista’, aunque no pocas críticas en torno al ‘modelo de desarrollo’ elegido se deslicen. Habían pasado diez años desde la llegada de los socialistas cuando se realizaba la anterior afirmación y ello en un momento precisamente no fácil para la economía del país. Con todo, no se dejaba de declarar lo siguiente: «España, como se ha mostrado en este capítulo, ya no es tan diferente de Europa. Pero el hecho de que sus culturas sean específicas en algunos rasgos sirve de base a la perpetuación del mito diferencial, alimentado por la visión, a la vez romántica y condescendiente, que los españoles suelen tener de los europeos del norte». *Ibidem*, p. 68. Por lo demás, un nuevo consenso político-teórico, antes que estrictamente ideológico, se afianzaría entre los socialistas por aquellas alturas, y que vendría determinado a su vez por la *exaltación* de los logros conseguidos. Por ejemplo: «España, al inicio de la década de los años noventa, era ya un país democrático, estable, un país moderno, con una economía dinámica, en el que se impulsaban las políticas sociales para aproximarse a los niveles medios de bienestar social de los restantes países europeos, y que había alcanzado un protagonismo importante en Europa y un reconocimiento bastante amplio a la labor realizada». TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 53.

¹⁴³ Por el momento un solo ejemplo puede ser ilustrativo. Nos referimos a las investigaciones realizadas por Álvaro Soto Carmona, quien en uno de sus trabajos sobre este mismo periodo señalaba con respecto al arranque de la política económica socialista lo siguiente: «Para llevar a cabo estos objetivos contó con un excelente ministro, Miguel Boyer, bien acompañado por Carlos Solchaga. Miguel Boyer era un socialista liberal que impulsó, desde el primer momento, una política rigurosa. Se trataba de lograr la estabilidad macroeconómica, desechando la puesta en práctica de políticas contracíclicas para impulsar la demanda interior como había hecho el gobierno francés». SOTO CARMONA, Álvaro, “Introducción” en id. (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, p. 9. Por su parte Javier Tusell y Justino Sinova no duraron en afirmar: «Ha sido un acierto y una suerte que el PSOE encaminara su gestión económica por caminos más ortodoxos [...]. En un momento en que no es frecuente el elogio, hay que alabar el fundamento esencial de la política seguida por Miguel Boyer y Carlos Solchaga (y, al fondo, Felipe González), que no solo consiguieron estos éxitos, sino que han tenido el mérito de instalar en los modos de gobierno en España una ortodoxia económica que va a ser irreversible». TUSELL, Javier y SINOVA, Justino, “Epílogo. El final de una etapa” en id. y id. (coords.), *La década socialista...*, *op.cit.*, p. 287.

¹⁴⁴ Términos empleados por, TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, *op.cit.*. Por otra parte no se dejaría de remarcar, por ejemplo, como los «los socialistas no se embarcaron en ningún experimento doctrinario en terrenos desconocidos. No emprendieron políticas económicas de carácter ‘voluntarista’». MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia..., *op.cit.*, O bien que en, «fase [primeros momentos del Gobierno socialista], para lograr esto [la modernización], por encima de las políticas concretas, era necesario actuar con realismo, con prudente decisión, con tacto y sin concesiones demagógicas. Ciertamente, un estilo político semejante produjo las

propio Francisco Fernández Marugán hablaría de la “normalización económica” a partir de un conjunto de prioridades y lógicas internas a un proyecto *común y definido*¹⁴⁵. Concretemos. El proceso de modernización, y añadiríamos de europeización, giraría en torno a tres grandes ejes:

- a) *Liberalización de la economía*: desregulación de los mercados, privatización de las empresas públicas, libre convertibilidad y flexibilización del mercado laboral.
- b) *Inserción de España en la división internacional del trabajo*: integración en la CEE, aceptación de las directrices de FMI y del BM y creación de las bases para la instalación del capital privado internacional¹⁴⁶.
- c) *Configuración de un nuevo “régimen regulador”*: transformación de un modelo productivo de base mayoritaria industrial a una sociedad de servicios.

Sin duda alguna, en todo este proceso hay “una lógica coherente en la estrategia de modernización que adoptó el gobierno socialista”, por más que luego se quisiera revestir aquellas decisiones bajo la “consigna” de la *única política económica posible*¹⁴⁷. Dicho esto, el análisis y balance que realizan los técnicos socialistas es evidente: los problemas de la economía española eran de carácter estructural, y, por tanto, la adopción de medidas a corto plazo no solucionarían las cuestiones pendientes. Técnicos, que como recalcó en su momento Charles Powell procedían de “posiciones ideológicas situadas en el extremo más templado del espectro socialista”¹⁴⁸. A partir de ahí vendrá la posterior explicación y justificación de la apuesta por un “materialismo político”¹⁴⁹, a donde vendrían a sumarse otros tantos argumentos defendiendo el

impaciencias estéticas de quienes pretenden quemar etapas». DORADO, Roberto, “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 62. Tesis todas ellas que se reflejarían en los documentos congresuales correspondientes: «Situamos las expectativas en su justo lugar, con explicaciones e informaciones contundentemente realistas, sin concesiones a la galería, sin alegrías demagógicas; metimos el bisturí con decisión para sanear el sistema financiero español de elementos enfermos que lastraban su funcionamiento y ponían en peligro su credibilidad internacional, e hicimos valer desde el primer día la autoridad democrática que nos había concedido el pueblo sin titubeos». AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria de gestión 1981-1984 [al] 30º Congreso, Madrid, 13-16 diciembre”, Madrid, PSOE-Comité organizador del XXX Congreso, 1984, sig. Fc 279, p. 12. Véase el balance cuatro años después que se ofrecía en, COMISIÓN PROGRAMA 2000, *La economía española...*, op.cit., y en concreto, “Capítulo VI. Cambios, perspectivas y problemas de futuro del sistema financiero español” (pp. 83-93).

¹⁴⁵ FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 54. No sin razón Javier Pradera al referirse al PSOE señalaría: «Los pragmáticos se han reconciliado con la realidad: la política es el arte de lo posible, el voluntarismo del poder produce efectos perversos y los cargos públicos imponen a sus titulares el recitado de un papel previamente escrito». PRADERA, Javier, “Las pasiones del poder: el PSOE tras diez años de Gobierno” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, op.cit., p. 282.

¹⁴⁶ O dicho con las palabras que expresara Castel, la «rehabilitación de la empresa». CASTEL, Robert, *La metamorfosis de...*, op.cit., p. 441.

¹⁴⁷ PETRAS, James, *El informe Petras...*, op.cit., p. 8. Definida por el mismo autor de la siguiente manera: «La liberalización de la economía en los primeros 80 era una condición necesaria para profundizar la inserción en la división internacional del trabajo. La inserción en Europa, a su vez, dio como resultado la consolidación de un nuevo régimen regulador basado en los ‘actores internacionales’. La ascendencia del nuevo régimen regulador prolongó el proceso de liberalización en los 90 y abrió las puertas a ulteriores tomas de poder extranjeras de la economía (internacionalización simétrica y mayor especialización de servicios)». *Ibidem*.

¹⁴⁸ POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 343. Véase asimismo la dura crítica contenida al respecto en, ORTÍ Alfonso, “Transición postfranquista a...”, op.cit..

¹⁴⁹ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia...”, op.cit., p. 56.

“carácter instrumental” de las políticas “liberales” empleadas para lograr unos fines sociales¹⁵⁰. Este fue el planteamiento, bastante simplista por cierto, que el primer Gobierno socialista presentó a la sociedad, y que, posteriormente, iría rellenando con otros muchos elementos técnico-político-económicos¹⁵¹.

Tal y como se ha recalcado la victoria del PSOE se produciría en un escenario concreto: los países del Sur de Europa que con la llegada al poder de otros partidos socialistas de la misma zona –Portugal, Grecia...– comenzarán a configurar un singular y emergente modelo de acumulación¹⁵². Para el sociólogo norteamericano James Petras lo característico de los partidos socialistas europeos de esta zona fue el paso de un *juvenil radicalismo* al *conformismo*, llegando a señalar: “A estos efectos prácticos, los PSSE sí que fueron «más allá» del estado del bienestar,

¹⁵⁰ Su planteamiento teórico hace ya tiempo que lo sintetizo José Félix Tezanos en lo que podría denominarse como el paradigma de la *modernización necesaria*: «En consecuencia, el objetivo de la *modernización* se convirtió en uno de los principales elementos de referencia inicial de la gestión socialista, como primer paso de un proyecto de cambio más profundo a largo plazo; como primer peldaño que era necesario asentar, si se quería tener una base firme en que apoyar cualquier política de progreso». TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 25. Por su parte Roberto Dorado señalaría: «Por otro lado, cabe señalar que la política económica ha tenido en la estrategia del gobierno un valor necesariamente clave, pero instrumental. Obviamente, es una política que ha buscado el crecimiento económico, liberando para ello las rigideces que encorsetaban la estructura económica española. Pero el crecimiento económico tampoco cualifica una política, lo que la cualifica es el modo de distribuir sus beneficios y, en época de crisis, sus costes». DORADO, Roberto, “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” en ibídem, p. 62. *Consignas* que tendrían su oportuna traslación a su vez a los propios documentos congresuales del PSOE: «Para los socialistas la política económica no es finalista sino instrumental [...] sanear la economía, hacer una reconversión industrial, modernizar nuestro aparato productivo no es un fin en sí mismo [...] [hay] un debate que a mí me parece que entre los socialistas debemos superar muy rápidamente: ¿qué es antes, la eficacia económica o la eficacia social? Este debate se ha repetido hasta la saciedad pero sin eficacia económica no hay eficacia social». Palabras de Felipe González en el XXX Congreso del PSOE (1984) extraídas de, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “El bienio socialista en perspectiva. Evolución ideológica del socialismo en la España actual” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., p. 40; «Pero el crecimiento no es para nosotros un fin en sí mismo, menos aún si su precio es la destrucción de recursos que son de todos, que forman parte de la riqueza colectiva. El modelo de desarrollo que proponemos deberá fomentar claramente la satisfacción de las necesidades colectivas». AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 9.

¹⁵¹ Un esquema que lejos de teorías y demás propuestas fue resumido de la siguiente forma por uno de sus principales promotores: «Para crecer había que invertir y para ello resultaba necesario alcanzar otros requisitos: corregir los desequilibrios e incrementar los excedentes de explotación de las empresas. Los instrumentos para lograr lo uno y lo otro eran conocidos, mayor ahorro, moderación de rentas, menores tasas de interés, más bajos niveles de precios, por sólo citar algunos». FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 149. De enorme interés, aunque apenas se haya realizado un estudio pormenorizado desde una perspectiva histórica, fueron los sucesivos proyectos de Ley de Presupuestos Generales de Estado que se debatieron en el Parlamento y en Senado durante esta década. Para entender sus dimensiones e implicaciones desde una perspectiva de lo jurídico, RUIZ TARRÍAS, Susana, *La posición constitucional del Gobierno en la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos Generales del Estado*, Almería, Universidad de Almería, 2003. Sobre esta misma cuestión se volverá, no obstante, con profundo detenimiento a lo largo de los diferentes apartados que componen el Capítulo “7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de crecimiento”.

¹⁵² Una visión generalista en, KITSCHOLT, Herbert, *The transformation of...*, op.cit..

dado que regresaron a una versión de la economía de mercado liberal ortodoxa que dejaría estupefacto al más derechista de los social-demócratas del Norte de Europa”¹⁵³.

Con la máxima por delante de *devolver la ilusión al país*, como señalará el propio Miguel Boyer, se iniciaría la planificación de una dura y ortodoxa *política de ajuste solidario* – un adjetivo que los socialistas añadirían para diferenciarse y que a su vez se emplearía como producto de *marketing* de cara a su clientela y militancia– con el objetivo de sanear la economía. Lo que en términos marxistas se conoce como la mejora de las *condiciones de reproducción del capital*¹⁵⁴. No tardaron en llegar las primeras decisiones “liberales” dentro del pretendido proceso de disciplina económica. El martes 6 de diciembre de 1982 en el primer Consejo de Ministros de la época socialista se aprobaba la devaluación de la peseta un 7.9%, junto con otras medidas tendentes a elevar la presión fiscal de cara a reducir el déficit público¹⁵⁵. Una decisión meditada fríamente en no pocas reuniones previas a la toma de posesión de los propios Ministros¹⁵⁶.

He aquí uno de los grandes hechos fundacionales y siempre recordados del primer Gobierno socialista. Ahora bien, resulta –a nuestro juicio– más interesante interrogarnos qué

¹⁵³ PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, *op.cit.*, p. 31. Año más tarde señalaría el mismo autor como en el Gobierno el PSOE adoptaría una «orientación empresarial con una perseverancia que impresionaría al thatcheriano más entusiasta». PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, *op.cit.*, p. 11. Véase asimismo la sutil crítica al respecto de, SOTELO, Ignacio, “El fiasco del socialismo mediterráneo”, *El País*, 16 de diciembre de 1984.

¹⁵⁴ Prácticamente todos y cada uno de los estudios sobre la confianza de los ciudadanos/consumidores y de los propios empresarios, en relación a la superación de la crisis económica habían reflejado niveles mínimos desde hacía tiempo. Entre otros estudios véase, ALVIRA MARTÍN, Francisco y GARCÍA LÓPEZ, Jorge, “La crisis económica: actitudes de los consumidores y empresarios”, *Papeles de Economía Española*, nº 2, (1980), pp. 99-133. Asimismo consúltase el más que interesante trabajo de, SIERRA, Fermín de la, *Los directores de las grandes empresas españolas ante el cambio*, Madrid, Centro de Estudios Sociológicos, 1981. Por otro lado, léanse los datos ofrecidos en su día por, DURÁN HERRERA, Juan José, SALAS FUMÁS, Vicente y SANTILLANA DEL BARRIO, Ignacio, *La formación de capital de la economía española en el contexto de la crisis (estructura impositiva, ahorro e inversión)*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Instituto de Estudios Fiscales, 1985. Véase, por lo demás, la *nota 216*.

¹⁵⁵ Y ello, a pesar de que en plena campaña electoral se había descartado esta opción. Noticia, “El Partido Socialista no tiene previsto devaluar la peseta si accede al Gobierno”, *El País*, 1 de octubre de 1982. Por lo demás, y como ha recordado el propio Miguel Boyer: «Cuando, a partir del triunfo electoral del PSOE, se establecieron los contactos entre los futuros ministros y los órganos de administración en funciones, pedí y obtuve que se me informará diariamente, por el Banco de España, de la evolución de las reservas de divisas y ello –aparte de mantenerme en vilo– me convenció de la necesidad de tomar medidas inmediatamente después de la formación del nuevo Gobierno, tanto de devaluación de la peseta como de rigor monetario». BOYER, Miguel, “El segundo ajuste económico de la democracia española (diciembre de 1982-julio de 1985)” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, *op.cit.*, vol. VIII.

¹⁵⁶ En el año 2006, Carlos Solchaga en un artículo en un suplemento especial de *El País* con motivo de su 30ª Aniversario, escribiría en torno a las dudas pero ante todo la falta de certezas sobre las primeras medidas económicas a tomar. De esta forma, incluso antes de que se dieran a conocer los nombres definitivos de los futuros ministros, recuerda como «Miguel Boyer nos convocó a su casa, como ministro de Economía y Hacienda *in pectore*, al gobernador y al subgobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles y Mariano Rubio; al director general de Estudios del banco emisor, Ángel Rojo; a quien había de ser nombrado secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y a quien esto firma antes de ser nombrado ministro de Industria y Energía». De esta forma, en aquella misma reunión se tomarían las primeras e importantes decisiones del primer Consejo de Ministros. SOLCHAGA, Carlos, “Una devaluación imposible” en *El País 1976-2006*, suplemento especial, 4 de mayo de 2006.

pasó entre el viernes 29 de octubre a aquel viernes 3 de diciembre de 1982. Y señalamos esto, por la proliferación de un conjunto de inéditos testimonios que ayudan a entender este primer conjunto de decisiones políticas así como sus *direcciones*. Decisiones que comenzarán a marcar un camino de *no retorno* en lo económico.

A lo explicado, de forma previa, en el *Capítulo 5* acerca del neto perfil *liberal* del equipo económico del PSOE y de la configuración de los propios equipos económicos de los Ministerios¹⁵⁷, o de cómo se toman las primeras decisiones a través del testimonio de Carlos Solchaga¹⁵⁸, o, de lo explicado por propio José María Maravall cuando cifraba como el *rumbo económico* estaba prefijado, inclusive, ante de la propia celebración de las elecciones de 1982¹⁵⁹; además de lo aquí mencionado habría que tener presente determinadas *actitudes* –leído en términos de prudencia pero también de recelos y miedos fundados en determinadas evidencias y percepciones– por parte de la dirigencia socialista con respecto a las clases dominantes, representadas, en lo básico, por la patronal y el capital financiero. Un ejemplo –a sumarse a otros tantos que se presentarán en este Epígrafe y en otros– de cómo la hegemonía electoral ni, por un lado, garantizaba una *hegemonía social* automática, ni, por otro, garantizaría una autonomía plena en lo económico.

A lo largo de estos últimos años se han podido localizar una serie de *pistas* en forma de testimonios y algún que otro comentario rastreable en una monografía, que sumadas proporcionan no pocas hipótesis de trabajo. Caminos de aproximación, rara vez rastreables en documentación oficial –y menos institucional– ni, en la práctica, en la *prensa*. En concreto, nos referimos a un conjunto de reuniones *secretas* –confidenciales, reservadas o no oficiales, a gusto del consumidor– entre los principales líderes socialistas y los representantes del capital en aquellos meses de transición, sobre los que, en términos generales, se suele pasar por alto con una inusitada rapidez.

Hace ya tiempo, Mercedes Cabrera y Fernando del Rey Reguillo señalarían, sin mayores precisiones o datos, en una conocida obra –*El poder de los empresarios*– lo siguiente:

«Al llegar al Gobierno en 1982, los socialista se preocuparon de reunirse con empresarios y banqueros, con la CEOE y con los presidentes de los grandes bancos. No sólo querían tranquilizarles respecto a sus intenciones, por si todavía tenían planes de nacionalización e intervencionismo estatal, sino que buscaban conformidades respecto a la política que pensaban poner en marcha para atajar la crisis»¹⁶⁰.

No mucho tiempo después, Alfonso Guerra en el segundo volumen de sus *memorias*, confirmaba como tras llegar al Gobierno sería invitado por la CEOE a un almuerzo en su sede. “Nuestro trato con banqueros y empresarios era para mí un territorio enigmático; no tenía confianza en las intenciones que albergarían respecto al nuevo Gobierno socialista”, trayendo a colación el precedente de las elecciones andaluzas de unos meses antes¹⁶¹. Aceptada la invitación, continúa el propio Guerra, “[a]cudí sin prejuicio a aquella comida en la que José María Cuevas, Arturo Gil y Fabián Márquez parecían mostrar grandes esfuerzos para resultar amables”. Para a continuación indicar: “Sólo fue sentarnos y José María Cuevas, presidente de la CEOE, con una sonrisa abierta, dijo: «Estamos encantados de que estés tú, en nombre del Gobierno, sentado aquí con nosotros». Y a partir de ahí,

«Inmediatamente le contesté, consciente de que era el momento clave para marcar el terreno de cada uno: ‘Presidente, si vamos a empezar mintiéndonos, no iremos muy lejos en nuestras relaciones. La verdad es que vosotros estaríais de verdad contentos si en esta silla

¹⁵⁷ Véase en el citado Capítulo 5 la formación y la procedencia de los principales técnicos de Economía, así como determinados fichajes del entorno del ‘Círculo de Empresarios’.

¹⁵⁸ Véanse la *nota 126* y la *nota 135*.

¹⁵⁹ Revítese lo apuntado en la *nota 130*.

¹⁶⁰ CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de..., op.cit.*, p. 352.

¹⁶¹ Véase aquí lo apuntado en el Capítulo 4, *nota 501*.

estuviese sentado Leopoldo Calvo-Sotelo. No pretendas convencerme de que vuestra preferencia electoral estaba en el PSOE, con no ser verdad, sería además grotesco».

De hecho, superado aquel primer momento, y según el citado testimonio, “pudimos hablar con claridad y con un grado de confianza mutua muy superior”¹⁶².

El anterior relato no sólo confirma esos *fluidos* contactos antes y después de la formación del primer ejecutivo socialista, sino que introduce, además, otras *pistas* a tener en cuenta, cuando se contrasta con el último de los testimonios disponibles. Nos referimos al de Mariano Guindal con *El declive de los dioses*. Veamos, primero, que expone en este caso. De entrada, y tras recordar como la “CEOE había puesto toda la carne en el asador en las últimas semanas de campaña electoral para evitar no tanto el triunfo del PSOE como la desmoralización de la burguesía empresarial”; se hacía eco de las posteriores peticiones del propio González a Leopoldo Calvo-Sotelo tras el 28 de octubre, acerca de la necesidad de que el Gobierno en funciones tomará una serie de medidas para evitar los movimientos especulativos que estaban devaluando a grandes marchas la peseta así como el encarecimiento del petróleo. Tras la negativa del propio Calvo-Sotelo, “González telefoneo a Carlos Ferrer Salta para celebrar un encuentro confidencial. La cita sería en El Parrillón, en la calle de Santa Engracia haciendo esquina con la plaza de Chamberí”.

Aquella cena clave tendría lugar en la larga noche del 10 de noviembre de 1982. Cena que omite Guerra en su memoria. Pero continuemos. El futuro Presidente, tras avisar que también iría el propio Guerra, aparecería en la cena con un “tercer invitado no previsto: Miguel Boyer”. Así quedaba claro que el propio Boyer se haría cargo tanto de Economía como de Hacienda y Comercio, aunque también se adelantaría que “no sería vicepresidente”. Apuntado: “Con ese dato, los empresarios entendieron que la concesión de poner a Boyer no suponía romper el tándem Felipe-Guerra”. Los extractos –cuya procedencia y fuente no se citan– de la conversación que revela Guindal se nos aparecen de una importancia fundamental para interpretar no pocos de los primeros movimientos de los gobiernos socialistas.

«Miguel Boyer hizo un frío análisis de la situación económica.

- Los sindicatos y los comunistas nos van a presionar fuertemente para conseguir sus reivindicaciones. La oposición no podrá hacer contrapeso, porque ha salido de las elecciones muy debilitada. Estamos al borde de la quiebra.

- ¿Qué esperáis de la patronal? – preguntó Carlos Ferrer Salat.

- Que seáis muy duros con nosotros. Esto equilibraría las posiciones. Además nos vendría muy bien que Leopoldo suba el precio de las gasolinas sin más tardanza. Y por favor, influid para que los bancos y las grandes fortunas no sigan sacando dinero. Los empresarios se miraron y Carlos Ferrer respondió.

- Muy bien. Seremos todo lo críticos que sea necesario; pero no creemos que Leopoldo os haga caso».

Pero aquella cena que finalizaría pasadas las tres de la madrugada daría para mucho más. No sólo saldría a relucir la temida cuestión de la nacionalización de la red eléctrica, sino inclusive Rumasa. Y también la propuesta de González de trabajar conjuntamente en torno a un pacto social (en donde inclusive se podía intuir el nombre del futuro AES):

«- Es absolutamente necesario firmar un gran acuerdo económico y social para toda la legislatura.

- ¡Presidente!

¹⁶² GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., pp. 34-35. Por cierto, Guindal cuestiona el propio testimonio de quien fuera Vicepresidente del Gobierno. Primero, obvia Guerra que la decisión de invitarle partiría tras el primer Consejo de Ministros en donde saldría adelante, entre otras medidas, el proyecto de redacción de la futura Ley de 40 horas. Como se obvia que quien transmite la invitación es el propio Ferrer Salat. En cualquier caso, se ha de estar atentos ya que el testimonio de Guindal señalaba que a quien esperaba la CEOE ver sentado –según el propio Guerra– es a Fraga, en vez a Leopoldo Calvo-Sotelo. GUINDAL, Mariano, *El declive de los...*, op.cit., pp. 207-208. Sobre las negociaciones –y conspiraciones– en torno a la Ley de 40 horas, nos remitimos al apartado “10.2.1. El momento de la toma de decisión política: la irrevocable necesidad de flexibilizar (marzo/mayo 1983-agosto 1983)”.

- No, no. Aún no soy presidente.
- Bueno, para entendernos –interrumpió Cuevas–, no hay tiempo para negociar un acuerdo de esas características donde se aborden reformas en profundidad. El ANE está a punto de concluir y hay que fijar los nuevos salarios para principios de año.
- Ahora, para salir del paso –tercio Boyer–, nosotros hemos pensado en un acuerdo interconfederal entre vosotros y los sindicatos. Dejando para más adelante un pacto más importante. Estoy firmemente convencido de que no podremos adaptar la economía española a Europa sin consenso social».

Como recuerda el propio Guindal, a partir del testimonio de Carlos Ferrer Salat, “«aquel acuerdo en El Parrillón funcionó correctamente por ambas partes»”¹⁶³. No sólo, pues, el apoyo expreso de la CEOE a Miguel Boyer, principalmente a través de Cuevas, se convertiría en una constante tanto durante su estancia en el Gobierno como a su salida y posterior paso por el Banco Exterior¹⁶⁴.

Hasta el día de hoy nadie ha cuestionado el testimonio que ha ofrecido Guindal. Siendo esto así –a saber rotos determinados *silencios*– no pocas cuestiones que habían quedado *oscurecidas* tanto en relación a las primeras medidas que se toman en los Consejos de

¹⁶³ GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, pp. 202-206. Como también recuerda el veterano periodista económico: «Al salir [de la cena] Carlos Ferrer ofreció a José María Cuevas acercarle a su casa: -¿Qué te ha parecido? –le interrogó-. Hemos sentado las reglas del juego y parece que coincidimos en el papel que tenemos que desempeñar cada uno. Luego ya veremos. -Creo que Boyer no dudará mucho tiempo en su cargo. -¿Por qué dices eso? -Hace un análisis excesivamente frío de lo que ocurre y de lo que tiene que hacer. Tiene muy poco tiempo y va a levantar ronchas en su base social». *Ibíd.*, pp. 205-206. Ha de tenerse presente como el propio Almunia aludiría en sus *memorias* también a ciertos contactos con la patronal: «La CEOE, por su parte, había celebrado alguna reunión previa con quienes íbamos a formar parte del área económica del Gobierno; en ellas había hecho gala de una actitud responsable, comprendiendo las dificultades económicas que debíamos afrontar y manifestando su disposición a echar una mano para ayudar a superarlas». ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*, pp. 154-155.

¹⁶⁴ Junto a las diferentes versiones que se han contado en el Capítulo 5 en relación a la *salida* de Boyer del Gobierno socialista, que como hemos visto no difieren en los aspectos centrales, residiendo las diferencias en detalles menores cuando no morbosos; una vez más Mariano Guindal ha aportado la otra perspectiva desde el lado empresarial, desde el lado de la CEOE. Por las mismas fechas en que se estaba elaborando y redactando el que se conocería como el ‘decreto Boyer’ [véase el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”], es decir, a finales de abril de 1985, el poderoso Ministro de Economía tenía claro que su salida del ejecutivo era cuestión de tiempo, a no ser que su arriesgada apuesta de lograr una vicepresidencia económica saliera adelante. Nos cuenta Guindal que la acumulación de problemas era tremenda: «Estaba harto de los sindicatos, de la patronal, del gobierno, de la oposición, y sobre todo de su propio partido». Y para colmo, «estaba descorazonado [...] se había enamorado de Isabel Presley». En aquella situación «aceptó la invitación a cenar con el ‘patrón de patrones’. De nuevo los lujosos salones del Jockey fueron testigos de una decisión histórica». Una cena en donde tras contarle todos sus desvelos, junto con una minuciosa lista de los *viejos y nuevos enemigos*, Cuevas afirmaría: «Mira, nosotros estamos dispuestos a respaldarte para que puedas seguir adelante. Vente el próximo día 4 [junio], que tenemos una reunión con todos los presidentes provinciales y les explicas la situación». Reunión a la que asistiría el propio Boyer y en donde obtendría el esperado respaldo a su gestión. Un martes 4 de junio en donde estaba convocada a la misma hora una gran manifestación contra la reforma de las pensiones impulsada, precisamente, por el sector liberal del Consejo de Ministros, y que dos semanas más tarde desembocaría en la primera huelga general contra el Gobierno socialista. A las dos siguientes semanas, un 6 de julio, Boyer salía del gobierno. El resto de la historia que se cuenta es ampliamente conocida en sus aspectos fundamentales. Aunque quizás sea también conveniente, siguiendo por enésima vez, a Guindal tener presente que aquella *salida* con el apoyo de la clase empresarial y otros poderes fácticos de la nación, junto con su posterior paso por la presidencia del Banco Exterior, dejarían si bien al mismo Boyer en una posición secundaria a nivel público, pero con un inmenso poder económico a la par que político como sucedería en pleno *boom* económico y en medio de importantes fusiones bancarias y de empresas de construcción. Y ahí de nuevo aparecía Boyer fichando por el mejor postor de la mano de grandes conocidos de nuestra justicia a la altura de 1988: los Albertos, de la Rosa.... *Ibíd.*, pp. 261-263 y 301-303, respectivamente. Por lo demás, consúltense los diferentes capítulos al respecto contenidos en, GUTIÉRREZ, José Luis, *Miguel Boyer, el...*, *op.cit.*

Ministros, como en relación a la política de *diálogo social*, entre otros asuntos no menores, se pueden explicar desde un prisma más claro y evidente. Como también resulta incuestionable que todavía queda mucho por conocer en relación a esas *fluidas* relaciones entre el empresario, los banqueros y otros tantos sectores del bloque dominante. Aunque, también es cierto, que a buen seguro no llegaremos a conocer muchos de aquellos movimientos previos, si no es por este tipo de libros, que no suelen prodigarse en nuestro ámbito.

A partir de mismas *pistas históricas*, y volviendo ahora a las primeras decisiones de calado que se tomarán en el primero Consejo de Ministros¹⁶⁵, la posibilidad de aplicar políticas expansivas y de demanda comienzan a quedar, en la práctica, descartadas. Una cuestión que no pasó en momento alguno desapercibida entre las filas de la familia socialista¹⁶⁶. No obstante,

¹⁶⁵ Véanse aquí al respecto y de nuevo, los testimonios, primero, de GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, *op.cit.*, pp. 44-46; GUINDAL, Mariano, *El declive...*, *op.cit.*, pp. 206-207, y de forma concreta, en este caso, el propio testimonio de Joaquín Estefanía sobre la rueda de prensa que tendría lugar el propio día 5 de diciembre en el salón Carlos III del Ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá, así como de sus más inmediatas consecuencias: «La intención primera de la devaluación formal de la peseta era la de cortar en seco la especulación contra esa moneda y la sangría de capitales a corto plazo, pero se sabía de sobra que para contribuir eficazmente a reequilibrar la balanza de pagos haría falta un mayor ajuste de las paridades y medidas de acompañamiento económico. De hecho, en los siguientes meses se dejó que las fuerzas de los mercados de cambios situaran a la peseta en su nivel adecuado, lo que supuso una depreciación del 18,6% de su valor medio en 1983 respecto al de 1982». ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, *op.cit.*, p. 252.

¹⁶⁶ Desde el sindicato hermano, la UGT, se advirtió tempranamente sobre esta cuestión. Pues una cosa era la colaboración en torno a un programa, una campaña electoral y, en suma, una relación fluida entre partido-sindicato hermanos; y, otra muy diferente con respecto a un Gobierno que, rápidamente, dejaría en el cajón buena parte de sus propuestas y promesas políticas. Nicolás Redondo, en la temprana fecha de diciembre de 1982 en un *informe de gestión* a la ejecutiva ugetista, avisaba del cual sería la posición del sindicato, previa defensa del triunfo socialista como propio del sindicato y por sí faltaban pruebas del movimiento obrero en su conjunto. «En definitiva, la postura de la UGT ante el nuevo Gobierno será lo que yo llamaría de fraternalmente crítica. Y no nos tiene que extrañar que ante las responsabilidades distintas entre el PSOE y la UGT, pudiera llegarse en determinados casos a reales divergencias. En ningún momento –se afirmaba– con ello se rompería nuestra trayectoria histórica, sino más bien se reforzaría la familia socialista en su conjunto desde la asunción claramente diferenciada, aunque complementaria de las tareas sindicales y políticas en una perspectiva de cambio social en profundidad». Además se apuntaba allí lo que la UGT entendía que debían ser las prioridades de un Gobierno socialista: «Pero lo que ya no entenderíamos tan claro, es que el análisis de la composición sociológica de sus diez millones de votantes, no fuera lo que condicionara en primera instancia, el nivel de prioridades y el calendario de su política de reformas a corto y a medio plazo, teniendo en cuenta que la mayoría absoluta parlamentaria garantiza al Gobierno, un grado aceptable de gobernabilidad que le permite afrontar con rigor y valentía los graves problemas que tiene España, y cuyas consecuencias sufren ante todo las clases populares». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría General, “VII Comité Confederal. «Gestión de la Secretaría General»”, Madrid, 4 y 5 de diciembre de 1982, sig. 002605-006, pp. 4-10. Bajo la consigna de *no traicionar al pueblo*, en todo caso el sindicato *congelaría* sus principales demandas durante el primer año largo de gestión socialista. Pasado con creces los primeros meses de confianza, y ya en el complicado año ochenta y cuatro, las relaciones PSOE-Gobierno-Sindicato tomarían un matiz diferente: «En todo este periodo de Gestión, las relaciones entre la Unión General de Trabajadores y el Gobierno socialista han sido de una cierta complejidad y han atravesado momentos especialmente tensos [...]. Constatamos en momentos muy especiales, cierta incompreensión en esferas gubernamentales». AHFFLC, UGT-CEC, “I Comité Confederal”, Madrid, 13 y 14 de enero de 1984, sig. 002606-002, p. 13. En el mes de junio de aquel mismo año en el desarrollo del II Comité Confederal la UGT se reconocía que el PSOE estaba dando la espalda a la ciudadanía, a la par que se denunciaba el incumplimiento de su programa electoral. Se evitaba, no obstante, calificar al Gobierno de derechas, por el momento: «No podemos aceptar, en primer lugar, el calificativo de ‘Gobierno de derechas’ que con ligereza prodigan ciertos sectores de la vida de este país que tienen en común el rechazo que han merecido de los ciudadanos en las elecciones que se han realizado». AHFFLC, UGT-CEC, “II Comité Confederal

más adelante, vendrían las justificaciones oportunas¹⁶⁷. Pues en gran medida se trataba de una política está última “recomendada” –por emplear una terminología si bien no neutra si de uso común en el ámbito de lo académico– informe tras informe por la OCDE¹⁶⁸, y como apuntara Vicenç Navarro defendida y respalda por los grandes medios de comunicación día a día¹⁶⁹. Se optaba, por tanto, por conseguir los equilibrios macroeconómicos necesarios para asegurar el crecimiento económico, continuando con “la política de austeridad del período anterior, situándose en un programa totalmente ortodoxo”¹⁷⁰. Nos encontramos, pues, con la primera de las grandes evidencias de la continuidad en lo político entre ambos ejecutivos.

Los técnicos del Gobierno socialista partieron también de otra premisa incuestionable. Las políticas expansionistas propugnadas por el *paradigma keynesiano* se habían demostrado no factibles, llegándose a calificar a su modelo resultante como un “verdadero amasijo de rigideces”¹⁷¹. El fracaso francés estaba demasiado cerca para ni siquiera plantearse esa posibilidad¹⁷². Por tanto, la búsqueda de la competitividad y la eficiencia económica tendrían,

Ordinario. «Informe de Gestión que presenta a la C.E.C», Madrid, 29 y 30 de junio de 1984, sig. 002603-003, p. 10.

¹⁶⁷ «No obstante, la forma profundamente negativa con que discurría, en 1982, el comportamiento de las variables básicas de la economía española puso de manifiesto la imposibilidad de aplicar una política expansiva de la economía que permitiera la creación masiva de empleo». PSOE, *Cuatro años cumplidos...*, op.cit., p. 12. Ahora bien, el mismo documento páginas más adelante en una retorcida revisión de lo realizado no dejaría de afirmar lo siguiente: «Por tanto, es evidente que la realidad económica con la que se enfrentó el Gobierno socialista ha obligado a cambiar la prioridad, practicando una política de corrección de desequilibrios, sin que por ello se abandonara una política económica con cierto grado de expansión». Ibídem, p. 27.

¹⁶⁸ Véase, PINA GONZÁLEZ, Arturo, “Treinta años de informes de la OCDE sobre la economía española”, *Información Comercial Española*, nº 676/677, (1989-1990), pp. 131-149. La OCDE, junto a otros organismos internacionales, no dejó de insistir en las mismas recetas «dando su diagnóstico y haciendo sus recomendaciones a la luz del nuevo paradigma de la Organización: el ajuste estructural positivo, con el fin de dar al sistema económico español la flexibilidad suficiente que le permitiera adaptarse a los nuevos condicionantes del marco económico internacional». Unas recomendaciones, según el mismo autor, que «tuvieron un escaso eco a la hora de traducirlas en medidas de políticas económica a largo plazo. Perdiéndose así, una oportunidad de configurar una estructura productiva e institucional para nuestro país, más apta y flexible». Ibídem, p. 131 y 147, respectivamente.

¹⁶⁹ NAVARRO, Vicenç, “Neoliberalismo, desempleo, empleo y Estado del Bienestar”, *Sistema*, nº 134, (1996), p. 27. «[L]os máximos exponentes de esta nueva ortodoxia son las revistas británicas *The Economist* y *The Financial Times* y la revista estadounidense *The Wall Street Journal*, el portavoz en la práctica del capital financiero de EE.UU.». Ibídem.

¹⁷⁰ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 48. Igualmente véase, en este sentido, una obra que ya puede considerarse como clásica para entender todo este campo de operaciones en el terreno económico: ANISI, David, *Modelos económicos: una interpretación de la macroeconomía*, Madrid, Alianza, 1991.

¹⁷¹ FUENTES QUINTANA, Enrique y REQUEIJO, Jaime, “La larga marcha hacia una política económica inevitable”, *Papeles de Economía Española*, nº 21, (1984), p. 38.

¹⁷² «Yo mismo [Miguel Boyer] había advertido a Felipe González, en 1981, que convenía moderar todo entusiasmo respecto a los socialistas franceses –que acaban de ganar las elecciones–, así como distanciarse de sus recetas, pues el fracaso de su política económica iba a ser sonado y digno de citarse en los manuales, y podría servir, en la política española de argumento contra el PSOE [...]. No obstante, el experimento francés, innecesario para abrirnos los ojos a algunos, como he dicho, sí resultó muy útil a efectos dialecticos y para convencer, en 1983 y años siguientes, de cuál era el camino de la sensatez a los militantes sin formación de economistas, e incluso de economistas de orientación keynesiana vulgar». BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, op.cit., p. 87. En este campo, otros autores han ido más lejos que los propios dirigentes socialistas. Ese es el caso Tom Burns: «Boyer y Solchaga tuvieron también la suerte de que Felipe González aprendió mucho antes que el resto de sus ministros lo que ellos ya sabían sin necesidad de ejemplos franceses: la aplicación de una política económica ortodoxa era

necesariamente, que tener un acento más clásico, más liberal. Asunto este que enlazaba con una corriente de pensamiento cada vez más mayoritaria dentro de las filas socialistas, y que bien puede resumirse de la siguiente forma:

«Al capital privado se le presume la eficiencia económica, y en línea con las más tradicionales interpretaciones del ‘laissez faire’, se le atribuye la mayor utilidad social. Por eso se recurre a estimular el beneficio privado por todos los medios posibles»¹⁷³.

No obstante, esta posición conllevaba irremediablemente otras consecuencias deseadas y/o no deseadas. Por citar una de las más importantes: la identificación de lo público con *ineficaz*. Sin duda un paso de enormes dimensiones¹⁷⁴. Para que esto fuera posible, y sobre todo para no ver dañada su legitimidad política, fue necesario asegurar la “paz social”, tal y como en parte se ha avanzado. Pues como avisó el propio Felipe González en una intervención en abril de 1983 –tras la firma del AI’83 en febrero de aquel mismo año– a los escasos cinco meses de constituirse el primer gabinete socialista:

«Las sociedades sólo podrán salir de la crisis en un ambiente social de paz y convivencia y con un fuerte compromiso social entre gobernantes y gobernados. En la actuales circunstancias intentar hacer fracasar a este Gobierno y poner una vez más en peligro la economía española es un delito de *lesa patria*»¹⁷⁵.

El esquema del que partía el equipo socialista era, pues, poco novedoso tanto en las *formas* como en las *medidas*, aunque no así en los argumentos siempre más vinculados a una concreta realidad nacional. En la práctica se ponían en marcha medidas que se están llevando no muy lejos de las fronteras del país, aunque con un entusiasmo cuando menos singular por tratarse de un Gobierno socialista, que por aquellas alturas no tenía como “antiguamente líderes obreros en puestos clave”. Pues, en verdad, “[e]l PSOE tenía ahora mucho más contenido de militancia no obrera, burguesa baja o media”¹⁷⁶. En suma, había llegado *la hora* de los técnicos, de los equipos económicos en donde lo económico se impondría frente a lo político¹⁷⁷. Además

imperativa». BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, 147. Consúltese también aquí el trabajo de, MARAVALL, José M^a, “What is Left?..., *op.cit.*. Y finalmente, ROSS, George, HOFFMANN, Stanley y MALZACHER, Sylvia (eds.), *The Mitterrand Experiment. Continuity and Change in Modern France*, Oxford, Blackwell, 1987. Véase asimismo, en el Capítulo 4, *nota* 458 y *nota* 459 entre otras y en el Capítulo 5, *nota* 94.

¹⁷³ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 52.

¹⁷⁴ En palabras de Miren Etxezarreta mientras que «al capital privado se le ofrece mucho y se le exige muy poco», por el contrario «la política respecto a la empresa pública se concentró en el saneamiento industrial y financiero, tratando al sector público como una indeseada rémora de etapas anteriores [...]. El sector público se sitúa en una subordinación casi total al capital privado, en una función de apoyo sin cualificaciones, aparentemente desprovisto de un diseño propio de actuación que trascienda los límites de la política más estrictamente coyuntural». *Ibidem*, pp. 54-55.

¹⁷⁵ Declaraciones de Felipe González en, PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *Un año para...*, *op.cit.*, p. 27.

¹⁷⁶ ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, *op.cit.*, p. 316.

¹⁷⁷ Sobre el preponderante protagonismo de los ‘técnicos’ socialistas que provenían del *ala derecha* del grupo de economistas del PSOE, véase su papel una vez ya instalados en el Gobierno en, SEGURA, Julio, “Del primer gobierno socialista a la integración en la CEE: 1983-1985” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *Economía española de...*, *op.cit.*, pp. 61-ss. Otros autores han ido más lejos: «Este equipo económico socialista tan moderado, formado por élites no conectadas con el electorado tradicional del partido [...], pudo controlar desde 1982 el Banco de España y los puestos ministeriales de Economía y Hacienda e Industria. Ellos, junto a otros menos visibles influyen en altos cargos liberales del PSOE, sustituyendo a la anterior burocracia, más estatista y menos autónoma, reduciendo de paso uno de los mencionados obstáculos institucionales a las reformas. Convencieron al resto del partido, con el apoyo de González, de la necesidad y bondad de éstas presentándolas como una oportunidad de racionalizar el sector público e incluso conseguir economía de escala». MOLINA ÁLVAREZ de CIENFUEGOS,

con otra nota destacada. El PSOE como vehículo del ascenso social entonces se había constituido en una realidad social. De hecho uno de cada 3,8 militantes del PSOE tenía un cargo público¹⁷⁸. O como señalaría agudamente James Petras:

«La gente (líderes y seguidores) que se habían comprometido en la lucha no se vieron beneficiados por el ascenso al poder. En su lugar, representantes de los sectores de menor militancia del partido, y los ‘tecnócratas’ [...] y que teóricamente estaban bien relacionados o con empresas locales o con la banca internacional, fueron situados en las carteras clave»¹⁷⁹.

Una vez inmersos en la *nueva lógica*, sí el objetivo era conseguir a toda costa recuperar e incrementar el crecimiento del PIB, se tenía, en primer término, que mejorar los equilibrios macroeconómicos –convertida esta tesis en la práctica en una “especie de referencia totémica”¹⁸⁰– pues una vez conseguido lo anterior todo comenzaría a funcionar teóricamente. O por lo menos, las reclamadas *condiciones necesarias* estarían asentadas. Surgía así un croquis de actuación que buscaba una respuesta adaptativa de las necesidades del capital:

▲ Beneficios ⇒ ▲ Inversión ⇒ ▲ Demanda ⇒ ▲ Empleo¹⁸¹

6.2.1.1. Principios de realidad: el *Programa Económico a Medio Plazo*

La formulación y puesta en marcha del *Programa Económico a Medio Plazo* –que en grandes líneas no se diferenciaba sustancialmente del “Programa a medio plazo para la Economía Española” de 1979 de UCD junto con sus posteriores adaptaciones¹⁸²– se instituiría

Ignacio, “La liberalización de la economía española (por efecto de la pertenencia a la Unión Europea)” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del sistema político español*, Madrid, Istmo, 2001, pp. 314-315. Asimismo, junto con todo lo mencionado en el Capítulo 5, revítese lo apuntado en, ORTÍ, Alfonso, “Transición postfranquista a...”, *op.cit.*; PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, *op.cit.*

¹⁷⁸ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*

¹⁷⁹ PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, *op.cit.*, p. 34. En la misma línea se expresaría Antonio Elorza: «Pero la salida de la crisis supuso un fortalecimiento del grupo dirigente y, por fin, el hallazgo de unos cuadros que, a pesar de su reciente incorporación a la militancia PSOE, llegaban con su capacidad técnica y unas claras ansias de abandonar todo cuando de utópico hubiera en el socialismo [...]». En términos de historia social, y sin el menor ánimo peyorativo, se podría aplicárseles la categoría gramsciana de *transformismo*, es decir, la captación por los grupos y clases dominantes, de intelectuales y sectores inicialmente adheridos a posiciones populares, todo ello en el curso de una revolución pasiva [...]. No es una traición, sino una adecuación». ELORZA, Antonio, “Las raíces del «fenómeno socialista»” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 63. Una crítica, en sentido contrario, acerca del PSOE como «vehículo de movilidad ascendente para muchos ciudadanos modestos» en PRADERA, Javier, “Las pasiones del poder: el PSOE tras diez años de Gobierno” en TUSELL, Javier Y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, *op.cit.*, p. 274.

¹⁸⁰ MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 150. Muy significativo, en este sentido, el trabajo cercano o desde las filas ‘socialistas’ de, SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política...*, *op.cit.*, y en concreto el epígrafe, “Algunos tópicos que deberían revisarse” (pp. 117-122).

¹⁸¹ Un texto que desmonta, paso por paso, todos y cada unos de los *dogmas* que existen sobre este esquema de política económica se encuentra en, NAVARRO, Vicenç, “Neoliberalismo, desempleo, empleo...”, *op.cit.*. Por lo demás, sobre el significado socioeconómico de esta estrategia a la inversa del paradigma keynesiano, véase lo apuntado en la *nota 41*.

¹⁸² MINISTERIO DE ECONOMÍA, *Programa a medio plazo para la economía española*, Madrid, Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía, 1979. Véanse asimismo, id. *Aspectos básicos de la política económica en 1979*, Madrid, Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía, 1979; MINISTERIO DE ECONOMÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN Y COYUNTURA, *La economía española en 1979*, Madrid, Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía, 1979; id., *La economía española en 1980 y las perspectivas a corto plazo*, Madrid, Secretaria General Técnica del

en la guía para las reformas descritas¹⁸³. Su presentación pública en septiembre de 1983 finiquitaría totalmente entonces cualquier abismo de una política socialdemócrata. Un programa cuya primera redacción sería redactada personalmente por el propio Miguel Boyer¹⁸⁴.

Presentado a los agentes sociales –sindicatos y empresarios– se buscaría su colaboración, la cual terminaría sin grandes acuerdos cuando no desencuentros¹⁸⁵. Su

Ministerio de Economía y Comercio, 1981; id., *La mejora de la productividad: un objetivo nacional*, Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, 1981. Junto a lo anterior, téngase también en cuenta las aportaciones de Leopoldo CALVO-SOTELO –“Las transiciones”– y Enrique FUENTES QUINTANA –“El conflicto entre democracia y crisis económica: la respuesta de los Pactos de la Moncloa” (pp. 23-75)– en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas..., op.cit.*. Ambos trabajos constituyen extraordinarios testimonios, primero de quien llegara a ser no sólo Presidente del Gobierno sino Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos en 1980; y en segundo término, de quien fuera Vicepresidente 2º del Gobierno y Ministro de Economía entre 1977 y 1978, y desde ahí capitaneara la puesta marcha del *Programa de Saneamiento y Reforma Económica* como antesala de los *Pactos de la Moncloa*. No puede dejar de apuntarse, aunque sea de forma breve, las reacciones, contestaciones y descalificaciones que desde los medios socialistas, tanto desde el Partido, el Grupo Parlamentario Socialista o el propio Sindicato se lanzaron contra el citado *Programa* del Ejecutivo de Adolfo Suárez. Por ejemplo, este último en un documento interno dedicado monográficamente a examinar dicho *plan*, llegaría a realizar una serie de duras acusaciones. Ahora bien, como se ha explicado y se explicará el núcleo central del propio *Programa Económico a Medio Plazo* no se diferenció sustancialmente del presentado en su día por UCD. Por esta misma razón resulta de interés, en términos históricos, observar como el sindicato socialista modificó radicalmente y sin vacilaciones su discurso político, dependiendo de quién estuviera en el poder. En suma, nos interesa examinar como aquello de una *única política posible* llegaría a calar y a constituirse en la práctica cotidiana en un ‘dogma de fe’ para un amplio espectro de la izquierda del país. Así pues, en 1979 desde la UGT se señalaría entre otras cuestiones: «En efecto, el P.E. [Plan Económico de la UCD] supone globalmente la asunción por parte del Gobierno de una estrategia económica al servicio de los sectores más influyentes de la burguesía y del empresariado»; «[E]l Gobierno mantiene un fe ciega en la transformación de los beneficios empresariales en inversión, y de ésta en creación de empleo. Para U.G.T., el funcionamiento de ese esquema no puede ser abandonado a las fuerzas del mercado, ya que de éstas no puede esperarse en este caso un resultado acorde con los intereses de la mayoría de la población». AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Reivindicativa, “Nota sobre el Programa Económico del Gobierno”, Madrid, 10 de septiembre de 1979, sig. 002279-006, pp. 1 y 7, respectivamente. Véase aquí también el apartado “9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. *Los arduos inicios de la flexibilización* (octubre 1976-marzo 1980)”.

¹⁸³ Una primera propuesta cuyo contenido principal se puede localizar en los siguientes documentos; MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, *Programa económico a medio plazo: documentos I y II*, Madrid, Secretaría General de Economía y Planificación [1984]; id., *Programa económico a medio plazo (1983-1986). Escenarios macroeconómicos para la economía española*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1984-1985. De ellos dijo en su día el economista Joaquín Estefanía algo que aquí se está remarcando: su continuidad con lo anteriormente proyectado. «Hay tres documentos de política económica que simbolizan la continuidad de esa larga marcha de la autarquía a la europeización a través del último medio siglo: el Plan de Estabilización de 1959; los Pactos de la Moncloa de 1977 [...], y el Programa a Medio Plazo de la Economía Española 1983-1986, con el que los socialistas comenzaron a gobernar la primera vez». ESTEFANÍA, Joaquín, “Un ansia de seguridad personal y social”, *El País*, 26 de marzo de 2007.

¹⁸⁴ «Con el fin de clarificar las dudas sobre las orientaciones económicas a seguir, el Ministerio de Economía y Hacienda comenzó a publicar un Programa Económico a Medio Plazo 1983-1986, cuyo primer documento –de 42 páginas– redacté yo mismo en estilo elemental y didáctico. Se trata de comunicar nuestro diagnóstico de la situación y la terapéutica en la que creíamos, enmarcada en una perspectiva a medio plazo, pero huyendo de pretensiones de planificación, al estilo cuantitativamente detallado de los antiguos Planes de Desarrollo». BOYER, Miguel, “El segundo ajuste económico de la democracia española (diciembre de 1982-julio de 1985)” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas..., op.cit.*, vol. VIII.

¹⁸⁵ De notable interés al respecto es, CEOE, *Bases para un programa a medio plazo de la economía española (La competitividad como objetivo)*, Madrid, CEOE, 1983. Nos remitimos aquí para un

publicación definitiva en el primer trimestre de 1984, a pesar de que no ocupara grandes titulares ni mayores atenciones, vendría a completar definitivamente el *cambio de rumbo* en la política económica, que se mantendría, en líneas generales, hasta mediados de los ochenta cuando entonces la programación económica se realizará año a año¹⁸⁶. Un gran programa económico que poco o nada tenía que ver no con el *programa electoral* del ochenta y dos, sino con cualquier postulado “progresista”, que con tanto ahínco defenderían los socialistas para explicar su política económica¹⁸⁷.

No obstante, aquel proyecto presentaba en lo técnico una novedad no desdeñable, pues “frente al diseño de escenarios «tendenciales»” característicos de anteriores propuestas ahora se partía de,

«escenarios ‘objetivos’ en los cuales la evolución de las principales macromagnitudes dependía del cumplimiento de una serie de condiciones preestablecidas entre las que debe destacarse la evolución económica internacional, la ‘política económica del Gobierno’ y los resultados de las negociaciones entre sindicatos y patronal sobre moderación salarial»¹⁸⁸.

Sus grandes cinco objetivos económicos serían resumidos por Joaquín Estefanía – probablemente el economista que más haya resaltado su importancia y oportunidad dentro de lo que llamaría el “obligatorio [...] periodo de ajuste– de la siguiente forma: “1. Ajuste del tipo de cambio, con el fin de contener la demanda interna y estimular la externa, de modo que se eliminase el déficit de la balanza de pagos”; “2. Elevación de la presión fiscal para desacelerar la demanda interna y frenar el crecimiento del déficit”; “3. Endurecimiento de la política monetaria para frenar la demanda interna y reducir la inflación”; “4. Repercusión de las alzas de los precios del petróleo de los años anteriores a los precios derivados de los productos derivados”; “5. Orientaciones sobre las elevaciones de los salarios”¹⁸⁹. Medidas, orientaciones, todas ellas que permanecerían, en la práctica, inalteradas, excepto en pequeños y ocasionales periodos, durante toda la época socialista.

Por lo demás, aquel *programa* también partía de unas premisas/interpretaciones fundamentales –a modo de diagnóstico y pronóstico de las relaciones capital/trabajo en su versión liberal-clásica¹⁹⁰– que quedaban lo suficientemente explicitadas en sus primeras páginas:

análisis en profundidad al apartado “9.3.3. “Meses de transición entre dudas y certezas. *El cambio titubeante* (diciembre 1982-febrero 1983).

¹⁸⁶ Véanse, entre otras muchas noticias e informaciones, las siguientes publicadas todas ellas en *El País*: “Los seis ámbitos del programa económico a medio plazo”, 13 de septiembre de 1983; “Gobierno reafirmará hoy a sindicatos y patronal su voluntad de concertación”, 13 de septiembre de 1983; “El Gobierno logrará situar la cifra de parados por debajo de los dos millones si se cumple el programa económico”, 15 de septiembre de 1983.

¹⁸⁷ Un primer balance orientativo sobre esta cuestión en, BALLESTEROS, Francesc, “Análisis comparativo de la evolución del programa económico del PSOE y la política económica del gobierno socialista”, *Papers ESADE. Estudios e investigaciones de los alumnos*, nº 9, (1996).

¹⁸⁸ MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, op.cit., pp. 123-124. Véase lo apuntado por el propio Boyer en la *nota 184*.

¹⁸⁹ ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, op.cit., pp. 252-255. De hecho, el propio autor incluiría en la citada obra el ‘Programa Económico a Medio Plazo’ en el anexo del libro en su primera versión de octubre de 1983.

¹⁹⁰ «Es imposible sugerir y estéril discutir sobre medidas económicas a adoptar si se carece de una interpretación –que sea correcta o no, será una cuestión a debatir– de los problemas económicos por los que atraviesa la economía española. Con demasiada frecuencia, a este respecto, suele confundirse interpretación con mera descripción o enunciación de los propios problemas, con lo cual las políticas propuestas o sugeridas no dejan de ser, en último término, una ferviente manifestación de buena voluntad». SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política...*, op.cit., p. 123.

«Ante la caída de la relación real de intercambio que supuso la crisis y el empobrecimiento relativo del país, no se registró un ajuste de los costes del factor trabajo, que se multiplican por seis en el plazo de doce años (1970-1982), y mantuvieron un crecimiento superior al doble del que registraron los siete grandes países industrializados. Ello tuvo un fuerte impacto negativo sobre la competitividad de los bienes y servicios españoles, y contribuyó a acelerar la inflación, en un proceso en el que ni trabajadores ni empresario estaban dispuestos a asumir la pérdida de renta real que la caída de la relación de intercambio suponía, reaccionando los primeros con fuertes demandas de incrementos de los salarios reales, y los segundos trasladando estos incrementos a precios, como único mecanismo para intentar mantener su participación en la renta nacional»¹⁹¹.

Posteriormente se realizarían las oportunas revisiones anuales del mismo hasta 1986. Todo ello a través del *Programa Económico a Medio Plazo, 1984-1987* y el *Programa Económico a Medio Plazo, 1985-1988* y del *Programa Económico a Medio Plazo, 1986-1990*¹⁹², respectivamente, ante la constatación de “la dispar evolución de la realidad económica con respecto a las previsiones contenidas en el Programa 1983-1986”¹⁹³.

Como examinó en su día el economista Alberto Montero, lo cierto, es que las propias previsiones del Gobierno se verían incumplidas repetidamente. En unas ocasiones por puro *voluntarismo político*, en otros casos por *imprevisiones* y en no pocos otros momentos, simplemente, por la falta de “capacidad de los gobiernos en cumplir los objetivos propuestos”¹⁹⁴. Lo que viene a resumirse –en términos históricos– en como lejos de la aparente fiabilidad y capacidad técnica de los equipos socialistas, si se repasan tanto los citados programas económicos así como las predicciones contenidas en los *Informes de Coyuntura Económica* o los propios *Presupuestos Generales*, rápidamente se viene abajo esa imagen de *seriedad técnica* que se ha transmitido hasta el presente¹⁹⁵.

Matizado lo anterior, y una vez aprobado el primer *Programa Económico a Medio Plazo* en 1984, como advirtiera el Presidente del Gobierno se tendrían que tomar,

«medidas muy duras, tan duras, que el Gobierno anterior no quería tomarlas. Pero son medidas de gobiernos, y los ciudadanos, cuando se toman medidas de gobierno, aunque sean duras se sienten gobernados. La obligación de un Gobierno no es siempre poner buena cara ante el ciudadano. Tiene que poner la buena y la mala»¹⁹⁶.

¹⁹¹ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, *Programa económico a medio...*, *op.cit.*, pp. 17-19.

¹⁹² Id. *Programa económico a medio plazo, 1984-87*, III vols., Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General de Economía y Planificación, 1984/1985; vol. I, *Evolución general y proyecciones de la economía española*; vol. II, *Reformas estructurales e institucionales*; vol. III, *Políticas sectoriales*; id. *Programa económico a medio plazo, 1985-88*, II vols., Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General de Economía y Planificación, 1985, vol. I, *Proyecciones de la economía española*; vol. II, *Reformas estructurales e institucionales. Balance de 1984 y perspectivas*; y finalmente, id. *Programa económico a medio plazo, 1986-1990*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General de Economía y Planificación, 1986. Sobre los principales responsables de tales programas véase el Capítulo 5, *nota 81*.

¹⁹³ MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 124.

¹⁹⁴ *Ibíd.*, p. 150.

¹⁹⁵ Véase el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”.

¹⁹⁶ Declaraciones de Felipe González en, PSOE, *Hacia el cambio...*, *op.cit.*, 164. Por lo demás, en otras numerosas ocasiones ha vuelto a insistir en la razón de Estado, en la política de responsabilidad con el país, para justificar aquellas primeras medidas económicas como algo inevitable, pero que, al fin y al cabo, eran necesarias y no discutibles: «Nos tocaba hacerlo, y lo hicimos. Y yo lo vivía, sin duda con la preocupación y el dolor que produce tener que tomar decisiones que afectan al bienestar y a los intereses de personas concretas». En declaraciones en, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 826.

En breve, se dejaría de citar el programa electoral del ochenta y dos para hablar, a lo sumo, de “buenos deseos programáticos”¹⁹⁷. En gran medida, “el cambio más que un programa a menudo parecía una mística”¹⁹⁸. Como supo captar Santos Julia, la “única práctica posible es la acumulación de reformas, el único tiempo real el que permite el uso del poder para racionalizar y modernizar la sociedad y el Estado”¹⁹⁹. Tesis que los *soportes intelectuales* del socialismo –con Maravall, una vez más, en primera línea²⁰⁰– venían elaborando, paso a paso, desde 1979; mientras que, por otro lado, dichos postulados serían refrendados por una parte nada minoritaria de la academia, que de esta forma apuntalaría en el terreno teórico la dirección adoptada para la salida de la crisis económica²⁰¹.

Avaladas las medidas *muy duras* por parte del FMI y el BM en un relativo corto periodo de tiempo, se cumplirían los principales necesarios requisitos para entrar en la CEE²⁰². Ahora

¹⁹⁷ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Acción Sindical, ALMUNIA, Joaquín, “Las relaciones laborales y la crisis económica”, Madrid, 26 de enero de 1984, sig. AI 502-003, p. 3. Ahora bien, no ha dejado de ser frecuente, incluso en tiempos cercanos, leer o escuchar afirmaciones del tenor de lo siguiente: lo «paradigmático del primer Gobierno socialista es que aplicó y con gran empeño, una política económica a la que proponía en su programa electoral». FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit., p. 41. Así pues, y por citar un ejemplo lo suficientemente ilustrativo e informado, nos remitimos a lo que dijera con unas pocas palabras en su día Joaquín Estefanía: «El primer cambio, y no de lo más especulares, del PSOE en su contacto con la realidad de gobernar, fue tirar a la basura el programa económico electoral, basado en las teorías keynesianas de expansión de la demanda». ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, op.cit., p. 241. Por otro lado, ha habido quien ha reprochado al Gobierno socialista y a sus ministros económicos su «timidez» a la hora de emprender políticas de mayor calado. Tal es el caso de, RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “De la agonía a la agonía” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, op.cit., 52. Quien añadía además: «Esta situación, más el temor a que las alternativas socialistas –el *guerrismo*– fueran siempre peores, confluyeron en la actitud amigable que tanto analistas como medios de comunicación tuvieron hacia las autoridades económicas». Ibídem, p. 52.

¹⁹⁸ SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *El secuestro de...*, op.cit., p. 23.

¹⁹⁹ JULIÁ, Santos, “Continuidad y ruptura en el socialismo español en el siglo XX”, *Leviatán*, nº 17, (1984), p. 128. En una línea parecida Andreu Claret señalaría al respecto de la *idea-fuerza* del cambio, tras dos años del PSOE en el Gobierno, lo siguiente: «Pero no sólo no lleva muy lejos, sino que la propia idea de ‘cambio’, que es una idea yo creo política o que, al menos, fue recibida por los electores como idea profundamente política, totalizadora, sinónimo de transformación de la sociedad que conocíamos en el 82, se arrincona progresivamente a favor de una idea de ‘cambios’ en tal o cual aspecto de la gestión del Estado, en tal o cual aspecto de la política del país». CLARET, Andreu, “¿Hacia dónde va el Gobierno PSOE?” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., p. 52.

²⁰⁰ Sobre su papel, en concreto, véase el apartado “2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: la historia oficial/militante y los «soportes intelectuales» del socialismo español” así como y el apartado “4.4. «Por el cambio»: el *punto de no retorno* (1981-1982).

²⁰¹ Un ejemplo llamativo lo aporta, SOTO CARMONA, Álvaro, “Una acción más reformista que socialdemócrata” en id. (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit., quien hablaría de las «promesas innecesarias» contenidas en el programa electoral del ochenta y dos.

²⁰² Consúltese, en primer lugar, el trabajo de, VARELA, Félix y VARELA, Manuel, “España y los organismos económicos internacionales”, *Información Comercial Española*, nº 826, (2005), pp. 167-177. Dicho esto, véanse así mismo, las aportaciones siempre desde un mismo prisma de, MUNS, Joaquín, “España y el Fondo Monetario Internacional” (pp. 20-26) y MILLET, Montserrat, “Las relaciones de España y el Grupo Mundial” (pp. 27-33), ambos en *Economistas*, vol. XIX, nº 90, (2001) en un dossier dedicado precisamente a la *Internacionalización de la economía española*. Y en concreto, del primer autor, MUNS, Joaquín, *Historia de las...*, op.cit.. Obra que junto con la de, VIÑAS, Ángel, *En las garras del águila: los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe González (1948-1995)*, Barcelona, Crítica, 2003, ayudan a comprender la más que estrecha relación de la economía nacional con

bien, como señaláramos todas estas cuestiones suponían una *profundización y continuidad* de las medidas que habían llevado a cabo los gobiernos anteriores:

«En la actuación que estos gobiernos seguirán desde 1977 hasta hoy no habrá sustanciales diferencias *ni en las preocupaciones, ni el enfoque de los problemas, ni en el establecimiento de prioridades*. Aunque habrá muchas diferencias de matiz, de instrumentación técnica, de capacidad política, en lo más esencial de la política económica se mantendrá una clara continuidad»²⁰³.

Los gobiernos socialistas, con un respaldo mayoritario por parte del PSOE, adoptarían esta política económica con un estilo *autoritario y arrogante*²⁰⁴. Por otra parte, en poco o nada ayudaría algunos comportamientos públicos que han de leerse en términos éticos –o si se prefiere *estéticos*– que mal encajaban a nivel social con la solidaridad y la necesidad de los ajustes tantas veces proclamadas²⁰⁵. Todos estos factores, tendrían un enorme costo a nivel de la

la superpotencia económica a través o no del FMI o del BM. Por último, y como señalara Héctor Hugo Barbagelata, tener o no la aceptación del Fondo Monetario Internacional se convirtió en una condición *sine qua non* para acceder a la primera liga de la economía internacional: «El efecto expansivo de la profesión de neoliberal de los técnicos y conductores de la política del FMI no daría sólo de la eventual persuasión de sus recomendaciones, sino más bien, y fundamentalmente, del poder que ejerce a través de los mecanismos de las llamadas ‘cartas de intención’, que muchos Gobiernos no tienen más opción que aceptar para acceder al crédito internacional y resolver otros problemas financieros apremiantes». BARBAGELATA, Héctor-Hugo, “El advenimiento del neoliberalismo y los posibles cambios estructurales del Derecho del Trabajo”, *Revista Española de Derecho del Trabajo*, nº 54, (1992), p. 499.

²⁰³ GARCÍA DÍEZ, Juan Antonio, “Política de ajuste”, *Información Comercial Española*, nº 676/677, (1989), p. 63, dentro de un dossier monográfico titulado, *Cincuenta años de economía española: 1939-1989* [cursiva en el texto original]. El citado autor sería Ministro de Economía (1981-1982), Vicepresidente Primero del Gobierno (1982) entre otros muchos cargos institucionales bajo los gobiernos de la UCD. Por lo demás, como han resaltado, una vez más, Donato Fernández y Gustavo Matías el Ejecutivo con González a la cabeza «utilizó su inusitada fuerza y legitimidad política para aplicar una política de ajuste aun más contundentes que las iniciadas por poco tiempo a finales de 1977 con los Pactos de la Moncloa». FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer Gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit., p. 39. Los mismos autores destacaban –dentro del *consenso* académico liberal– como en la práctica la similitud entre los programas económicos entre UCD, PSOE incluido el PP respondían a la imposibilidad de formular otras ‘políticas posibles’: «[D]esde gobiernos de la UCD al PSOE y luego del PP y nuevamente del PSOE, el contenido ‘técnico’ de la política de ajustes ha sido similar, quizá por compartir la premisa de que los peores males de la crisis –corto crecimiento, aguda inflación y desempleo– carecen de remedio sin recuperar los equilibrios básicos de inflación y balanza (interior y exterior)». *Ibidem*, p. 41.

²⁰⁴ Pasado el tiempo los socialistas reconocerían parte de sus ‘errores’ en lo referente a su propio *estilo* de gobernar. Ahora bien, lejos de autocríticas en relación al citado estilo arrogante y autoritario, lo atribuirían, antes que nada, a cuestiones de *estética y/o ética*: «Y la estética es verdad que se pierde y se pierde, curiosamente, quizá por la falta de tradición, por falta de años de experiencia de muchos que llegan a asumir responsabilidades en el poder ejecutivo. En vez de implantar unos comportamientos políticos en el gobierno y en la administración propios de un partido de izquierdas, lo que sucede en muchos casos, en más de los imaginables, es que nos influyen las características del modo en que se ejerce el poder en España». Joaquín Almunia en declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, op.cit., p. 328. Revelador de todo este proceso desde los primeros años de la llegada al Gobierno, SOTELO, Ignacio, “Paradojas y aporías...”, op.cit.. La defensa de este *estilo de gobernar* en, DORADO, Roberto, “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit..

²⁰⁵ El ejemplo más recordado sería el uso del yate Azor por parte de Felipe González en el verano de 1985, y especialmente cuando «fue fotografiado, las manos en los bolsillos, la mirada retadora, en la cubierta de aquel barco de recreo» [SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *La crisis de la...*, op.cit.]. Un buque que sería empleado por Francisco Franco en numerosas ocasiones, quedando grabada en la memoria colectiva de la ciudadanía sus gestas pesqueras. Sin embargo una posible lista daría para varios capítulos desde el empleo por parte de Alfonso Guerra de un *Mystère* –para quien a su vez la utilización de González del Azor, sería «primero error con proyección pública» [GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás*

cultura democrática, pero también de la vida parlamentaria en una democracia que apenas había comenzado a andar.

Mucho menos arrogantes se mostrarían con las “misiones” y posteriores “recomendaciones” del FMI. A pesar de que está por realizarse un estudio minucioso sobre el asunto –un análisis difícil de poder realizar a corto plazo ante la política ultra-restrictiva de acceso a la documentación por parte del propio Fondo Monetario Internacional– las evidencias disponibles muestran una amplia sintonía entre las directrices del citado órgano internacional y los gobiernos socialistas año tras año²⁰⁶. Un hecho constatado y destacado en los propios *documentos socialistas* en más de una ocasión:

«A los pocos meses de iniciarse la gestión socialista, el Fondo Monetario Internacional valoró muy positivamente la política económica aplicada por el Gobierno, opinión que repitió en octubre pasado, a la vista de resultados concretos. Impresiones compartidas, durante el VII Congreso Mundial de Economía, celebrado en Madrid, por prestigiosos economistas, como Franco Modigliani del Massachusetts Institute of Technology, o el español Fuentes Quintana, quien vino a afirmar que la única salida a la crisis en nuestro país era la que había emprendido el Gobierno socialista»²⁰⁷.

los..., op.cit., p. 200]–para llegar a tiempo a una corrida de toros en la Maestranza de Sevilla, al piano que Narcís Serra que se haría comprar para un chalet en Madrid, o puestos a la tarea la aparición de altos dirigentes socialistas, incluidos más de un ministro, en las portadas de las revistas del corazón... A todos los ejemplos anteriores, podrían sumarse decenas. En su mayor parte desconocidos. Desde el dinero en negro entregado mes a mes a todos y cada uno de los funcionarios que trabajaban en el complejo de La Moncloa procedente de los fondos reservados, a otros tantos gastos santuarios de buena parte de sus ministros. Todo un conjunto de ejemplos que pueden leerse en, HERRERA, José Díaz y DURÁN, Isabel, *Pacto de silencio..., op.cit.* .

²⁰⁶ Como se hace constar en el reglamento de archivos del propio Fondo Monetario Internacional con sede en Washington, en su artículo “I. Acceso a los Archivos del FMI”: «Documentos del Directorio Ejecutivo, con plazos de divulgación de 5, 10 ó 20 años, excepto en el caso de información clasificada. Otros archivos institucionales, con un plazo de divulgación de 20 años. No están abiertos al público: i) los documentos legales protegidos por privilegios de la relación entre apoderado y cliente; ii) los documentos confidenciales remitidos al FMI por partes externas, como los países miembros, sus entidades y bancos centrales, a menos que dichas partes autoricen su divulgación». Junto a estas restricciones se suman otras tantas, lo que en la práctica imposibilita poder acceder a los informes realmente relevantes de este organismo público. De hecho, la escasa y fragmentada información a día de hoy disponible –algún que otro documento del Directivo Ejecutivo u otros informes más generales– que pudiera ser de interés –los propios informes confidenciales, las ‘otras’ recomendaciones y obligaciones que no aparecen en los documentos públicos, las respuestas de los Estados examinados...– no permite aventurar ningún tipo de hipótesis de trabajo firme. En todo caso, junto a la bibliografía citada en la *nota 34* y la propia página web del FMI dedicada a España [www.imf.org/external/country/esp/index.htm], el citado FMI ha venido publicando un conjunto de trabajos –con aspecto e intención de “manual”– desde su misma fundación. Un conjunto de ellos son claves para entender en una *segunda lectura* sus recomendaciones así como sus directrices: KILLICK, Tony (ed.), *Adjustment and financing in the developing world: the role of the International Monetary Fund*, London, International Monetary Fund / Overseas Development Institute, 1982; FURSTENBERG, George M. von, *International money and credit: the policy roles*, Washington, International Monetary Fund, 1983; INTERNATIONAL MONETARY FUND, *The exchange rate system: lessons of the past and options for the future*, Washington, International Monetary Fund, 1984; GARRITSEN de VRIES, Margaret, *Balance of payments adjustment, 1945 to 1986: the IMF experience*, Washington, International Monetary Fund, 1987... Y de especial interés, INTERNATIONAL MONETARY FUND, *Technical assistance and training services of the International Monetary Fund*, Washington, International Monetary Fund, 1985. Por último, el FMI ha venido publicando los conocidos *World Economic Outlook [Perspectivas económicas mundiales]* año tras año en donde se examina la situación de la economía mundial en diferentes niveles y planos.

²⁰⁷ PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *Un año para..., op.cit.*, p. 26. Sobre la amplia resonancia informativa de tal congreso véase, Noticia, “El economista Franco Modigliani elogia la política de Felipe González y Miguel Boyer”, *El País*, 8 de septiembre de 1983. Allí mismo se recordaba, primero, como «Modigliani, a quien se considera próximo a las teorías liberales de la Escuela de Chicago», no dudaría en apoyar decididamente a Boyer, y tras diagnosticar como la salida de la crisis

Parecida sintonía se tendría con clases dominantes con el adjetivo o no de los *poderes fácticos*²⁰⁸. O si se prefiere como dirían los propios socialistas con los “círculos económicos más dinámicos y modernos del país”²⁰⁹. O todavía más claramente más: un empresario “democrático y participativo”²¹⁰. Más allá de ciertas *salidas de tono* de carácter prepotente por parte de los socialistas al recordar aquellos años, en verdad y tal como se explicó en líneas anteriores, el *diálogo* con la clase empresarial siempre prevaleció frente a un posible marco de conflicto²¹¹. Una sintonía *política* cuando no *personal* que lejos de espejismos ideológicos –izquierda, derecha, socialismo o no– está bastante más conectada con la “propia significación sociológica misma del PSOE”. En tanto, “[n]o se trataba de un partido obrero, sino de un partido burgués «de centro», ilustrado, apoyado por un obrerismo reformista tradicional”²¹². Así pues, aquellas relaciones iban más allá de lo que una ocasión definiría el mismo Miguel Boyer como de “correctas”²¹³. Como destacaría Antonio Elorza hasta en el propio estilo a la hora de establecer

pasaba por «eliminar la actual situación de inmovilidad laboral y de altos costes salariales», afirmaría: «Yo deseo que sus programas de flexibilización del mercado laboral y reducción de salarios reales logren el apoyo del Parlamento y de las fuerzas Sociales».

²⁰⁸ Temor fundado en no pocas evidencias y que determinaron los pasos, los tiempos, las estrategias de la UGT con respecto a las actuaciones del Gobierno socialista, como uno de los mejores ejemplos de las sospechas que levantaba la ‘cauta moderación’ del Ejecutivo en el ámbito económico. «La CEOE podría intentar condicionar el programa del Partido Socialista, tratando de amarrar decisiones en el terreno económico y social, lo que equivaldría a recortar el programa del PSOE en materia de relaciones industriales, cuando este programa, lo hemos dicho, resulta innegociable, bajo ningún pretexto». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “VII Comité Confederal. «Gestión de la Secretaria General»”, Madrid, 4 y 5 de diciembre de 1982, sig. 002605-006, p. 22.

²⁰⁹ TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 31.

²¹⁰ Términos empleados por, AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Acción Sindical, ALMUNIA, Joaquín, “Las relaciones laborales y la crisis económica”, Madrid, 26 de enero de 1984, sig. AI 502-003, p. 27. En concreto el Ministro de Trabajo realizaría la siguiente declaración dentro de una larga conferencia: «Al empresario autoritario –o paternalista a veces– le sustituye por todas partes el empresario democrático y participativo. Sin una dirección impregnada de ese estilo se derrochan las energías de la empresa, se agudizan los conflictos de intereses y se pierden en suma facultades para competir en el exterior, para introducir nuevos productos y servicios en el mercado y para mantenerse en el». *Ibidem*.

²¹¹ El que fuera Ministro de Economía y Hacienda –Miguel Boyer– con su habitual tono con ciertos dejes de prepotencia afirmaría: «Con la autoridad de González y los doscientos dos diputados que teníamos no había ninguna necesidad de hacer algo para meter en cintura a determinados sectores». En declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 305. Por su parte a Carlos Solchaga no le faltaría tiempo para reunirse con los presidentes de los siete grandes bancos cuatro días después su nombramiento como Ministro de Economía –un 9 de julio de 1985– de cara a explicarles sus planes al frente del Ministerio. TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, pp. 111-113. Consúltese asimismo, COSTAS, Antón y NONELL, Rosa, “Organización de los intereses económicos, función empresarial y política económica en España. El caso de la CEOE” en COMÍN, Francisco y MARTÍN ACEÑA, Pablo (eds.), *La empresa en...*, *op.cit.*, pp. 457-471. Y en concreto, DÍAZ-VARELA, Mar y GUINDAL, Mariano, *A la sombra...*, *op.cit.*.

²¹² ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, *op.cit.*, p. 317. James Petras con su tono contundente habitual afirmaría: «El ejercicio de poder realizado por el Partido Socialista Obrero Español ha tenido poco o nada que ver con la clase obrera y todavía menos con la eliminación o atenuación de las diferencias de clase. Más concretamente, el Partido Socialista ha sido el vehículo de la subida al poder de una nueva clase de profesionales en ascenso». PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, *op.cit.*, p. 12.

²¹³ Entrevista a Miguel Boyer en, PSOE, *Hacia el cambio...*, *op.cit.*, p. 124. Por su parte Felipe González a la pregunta: «Pero, en alguna de las decisiones que usted ha tomado hasta ahora, ¿no ha estado condicionado expresamente por alguno de los poderes?» Respondiendo con una expresión

relaciones, los propios rituales se acercaron siempre más a los hábitos de la clase dominante que a los relacionados con el mundo del trabajo²¹⁴.

Una situación que, junto con la propia forma de dirigir los *asuntos de Estado*, sería denunciada en numerosas ocasiones por la UGT, quien se quejaría amargamente del trato recibido por parte del Gobierno en estos primeros años: “Hay que decir, en cualquier caso, que la unilateralidad de las medidas, su falta de consulta con los sindicatos, han contribuido a su incomprensión y recelo por amplios sectores de la sociedad”²¹⁵. Los empresarios, sus *lobbies* y sus organizaciones eran de otra muy extendida opinión, más allá de sus perennes reticencias contra el socialismo incrustadas en su *memoria colectiva*, pues *distancias* aparte las mismas no les impidieron *cuajar* una relación cuando menos armónica²¹⁶. “¿Qué ministro de la derecha podría haber hecho lo que yo?”, le llegaría a preguntar el propio Miguel Boyer a Ysasi Ysasmendi, presidente del Círculo de los Empresarios²¹⁷. Por su parte, y pasado un tiempo

‘contundente’: «La verdad es que no». Entrevista a Felipe González en, PSOE, *Hacia el cambio...*, *op.cit.*, p. 152.

²¹⁴ «Por su supuesto, tampoco la política económica del PSOE había de convertirse en el simple reflejo de los planteamientos de la CEOE, en definitiva grupo de presión maniatado por una visión económica a corto plazo. La política ‘socialista’ viene a encarnar, por así decirlo, la realización de la lógica del sistema capitalista, aun a pesar de los mismos capitalistas. No es de extrañar que esté más próxima (incluso físicamente, en rituales y cenas) de los dirigentes de la gran banca que del comerciante o del propietario agrícola. Los grandes principios de la política económica neoliberal son asumidos». ELORZA, Antonio, “Las raíces del «fenómeno socialista»” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, pp. 66-67.

²¹⁵ AHFFLC, UGT-CEC, “IV Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 28 y 29 de junio de 1985, sig.ant. A/02/29, p. 10. Al año siguiente durante el desarrollo de su XXXIV Congreso ugetista, tras hacer una exhaustiva valoración de la gestión gubernamental, la UGT terminaría denunciando el carácter autoritario en relación a la propia forma de gobernar de los socialistas: «Nuestra crítica puntual –que no ha tenido suficiente comprensión en la familia socialista– y nuestra exigencia de cumplimiento del programa explican mejor que muchas alambicadas interpretaciones y extrañas referencias a la modernidad, las fricciones que en determinados casos concretos se han producido y que quizá se han magnificado indebidamente por la falta de experiencias históricas similares». AHFFLC, UGT-CEC, “Informe de Gestión presentado por el Secretario General al XXXIV Congreso”, Madrid, 2-6 de abril, 1986, sig. 001635-004, p. 7.

²¹⁶ Una ‘colaboración’ Ejecutivo-Capital con un objetivo evidente según James Petras: «La política de reconciliación fue la piedra angular del diseño de políticas de desarrollo, excluyendo así, sistemática y conscientemente, cualquier medida que pudiera sentar mal a los centros de poder tradicionales (mucho menos polarizar la sociedad)». Una década más tarde el propio autor llegaría a afirmar: «In the economic sphere, the Socialist regime has presided over the fusion of old and new members of the dominant class. Most evident is the large number of newly rich Socialist bankers, real-estate speculators and building contractors». PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, *op.cit.*, p. 34; y, id., “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y id. (eds.), *Mediterranean Paradoxes...*, *op.cit.*, p. 97, respectivamente. Aquí consúltense entre otros estudios, MARTÍNEZ SOLER, José Antonio, *Los empresarios ante la crisis económica*, Barcelona, Grijalbo, 1983; o GARCÍA FERRANDO, Manuel, “Actitudes de los empresarios españoles ante el cambio social y la crisis económica”, *Revista Internacional de Sociología*, nº 49, (1984), pp. 85-100. Claro está que cuando se trata de visiones fundamentalistas todo parece poco. Véase, el relato de RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “El Círculo y el socialismo” en id., *25 años del...*, *op.cit.*, pp. 85-ss. Véase, por lo demás, lo ya apuntado en la *nota 154*.

²¹⁷ *Ibidem*, p. 89. Y señalaba además: «Un aspecto del pragmatismo que llevó al Círculo a tener relaciones más fluidas con el Gobierno socialista fue la creencia no sólo de que el tándem Boyer-Solchaga era preferible a cualquier otra alternativa dentro del PSOE, sino también fuera de él». *Ibidem*. Asimismo véanse las fluidas relaciones del propio Boyer con la élite económica del país en, GUTIÉRREZ, José Luis, *El hombre que...*, *op.cit.*. Igualmente ha de tenerse presente las reflexiones de Francisco Alburquerque en este sentido: «La creciente articulación de los intereses de los grupos dominantes al interior del Estado con los intereses foráneos de los principales grupos oligopólicos internacionales, no constituye sino la expresión, en el plano de la estructura social, de los nuevos agentes hegemónicos en el poder, que objetivamente encuentran en la política económica de los actuales

prudencial no pocos portavoces del mundo empresarial mostrarían la confianza o cuando menos un acuerdo sustancial con respecto a la política económica desarrollada²¹⁸. De hecho, el propio Presidente de Gobierno calificaría su relación con los empresarios de la siguiente manera:

«¿Confianza con el mundo de la empresa? –se preguntaba Felipe González–. Confianza, confianza [...]. Bueno, con nosotros existía una connivencia bastante armoniosa, y una cierta relación de respeto. Ahora, aquella relación empieza a resultar más interesante, porque yo interfería muchísimo menos –como poder– que lo que está interfiriendo la derecha en las decisiones empresariales y en la propia autonomía de las libertades de empresa»²¹⁹.

Tomadas las decisiones oportunas, y reflejadas convenientemente en el *Programa Económico a Medio Plazo*, la estrategia de modernización se desarrollaría de manera gradual, tratando de limitar, en la medida de lo posible, los *previsibles desajustes* así como los *necesarios sacrificios*²²⁰, y cuidándose mucho en evitar conflictos sociales y frente a los sindicatos de clase.

Una estrategia a la *ofensiva* que sería acompañada de amplias campañas de propaganda, de explicación, todo ello dentro de la “política responsable” con la que Gobierno y Partido trataron argumentar tales medidas. La denominada “responsabilidad histórica”²²¹. Campaña de información (y/o propaganda) a favor, una vez más, de las medidas “duras” pero “necesarias”²²², a la par que enormemente “impopulares”²²³.

gobernantes el más valioso instrumento; y entre los ‘militantes’ del partido en el gobierno, algunos de sus más entusiastas servidores». ALBURQUERQUE, Francisco, “Una crítica al estilo de crecimiento asociado al capital transnacional en la España actual, y orientaciones básicas para una política económica alternativa de desarrollo económico”, *Sistema* nº 80-81, (1987), p. 139. Véase lo ya apuntado en el Capítulo 5, *nota 75 y nota 76*.

²¹⁸ Por ejemplo una publicación tan poco sospechosa como *Acción Empresarial* relacionada con la entidad Acción Social Empresarial (ASE), planteaba en su *editorial* del número 131 (1988) su postura frente a los gobiernos socialistas: «En definitiva, parece que las tesis económicas del Gobierno están orientadas a generar riqueza con la repercusión social que esto supone, evitando otros tipos de reparto social mediante fórmulas redistribuidoras, objeto clásico de gobiernos socialistas y socialdemócratas». Extraído de, GARCÍA DURÁN, Raúl, “La lucha de clases: pragmatismo ¿para quién?” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del..., op.cit.*, pp. 449-450.

²¹⁹ Declaraciones de Felipe González a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada..., op.cit.*, pp. 802-803. Carlos Rodríguez Braun en su monografía sobre el Círculo de Empresarios llegaría a señalar lo siguiente: «Comparando la realidad con sus expectativas, es razonable que los empresarios –y muchos otros que vieron que los socialistas eran menos intervencionistas de lo que se había previsto– concluyeran que la política económica del PSOE era la única política posible, y que respaldaran a Boyer y a Solchaga frente a sus adversarios». RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, *25 años del..., op.cit.*, p. 88. Por su parte, Carlos Berzosa criticaría duramente estas relaciones de *confianza*: «Ante las dificultades que tiene la iniciativa privada para recuperar la inversión, resulta sumamente peligroso confiar en el empresario privado para llevar a cabo un proceso de acumulación del capital y generar empleo a partir del mismo. Hay que hacer la consideración de que históricamente el empresario español no se ha caracterizado por su faceta emprendedora y por su función renovadora y de asunción de riesgos». BERZOSA, Carlos, “La política económica del PSOE. Condicionantes y presupuestos” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista..., op.cit.*, p. 76.

²²⁰ El mismo Miguel Boyer llegaría a declarar a los escasos tres meses de su toma de posesión: «Yo espero que el país haya comprendido que éstos eran sacrificios que había que hacer». Entrevista a Miguel Boyer en, PSOE, *Hacia el cambio..., op.cit.*, p. 122.

²²¹ Entre otros muchos ejemplos, nos remitimos al ejercicio autocomplaciente de revisión de los cuatro primeros años de gestión realizado por el Gobierno socialista, en donde a través de una publicación oficial del PSOE, se decía, entre otras muchas cuestiones, lo siguiente: «El Gobierno socialista no vaciló en utilizar su capital político para superar, con responsabilidad histórica, este aspecto deficitario de la evolución del aparato productivo, en una perspectiva global de corresponsabilidad de los interlocutores sociales». PSOE, *Cuatro años cumplidos..., op.cit.*, p. 13.

²²² Véanse las enormes preocupaciones ante un posible rebrote de la conflictividad laboral, junto con las instrucciones precisas para una futura campaña de propaganda en: AHFFLC, PSOE-CEF,

Ahora bien, como destacó Miren Etxezarreta en “ningún momento el gobierno socialista se sintió obligado a justificar su opción. Se daba por sentado que era «la única política económica posible» e incluso esto sólo se adujo más tarde, cuando comenzaron las críticas”²²⁴. Por lo demás, si en estas campañas que llevaría adelante el PSOE –a modo de correa de transmisión que, en la práctica, se mantendría *inalterada* durante toda la “época socialista– una idea sobresaldría de forma repetida e insistente: la “solidaridad como el motor de la política económica”²²⁵. *Solidaridad* pero también *sacrificios* como se reconocía en un documento interno de estrategia del PSOE del año 1983:

«La política económica del Gobierno está proyectada para proporcionar una salida a la crisis económica a medio y largo plazo, pero exige a corto determinadas medidas que de hecho resultan impopulares y que provocan rechazo en colectivos que tradicionalmente respaldan al Partido Socialista. Los socialistas –remarcaba el documento– debemos ser conscientes de que vamos a encontrar dificultades ante la adopción de decisiones que exigen sacrificios salariales, ajustes de plantilla en los procesos de reconversión industrial, medidas en relación con el mercado de trabajo, reforma de la Seguridad Social, etc., que son imprescindibles en el contexto de una política económica que tiene como objetivo una salida progresista de la crisis económica y en la que las contrapartidas económicas, necesarias y que están siendo adoptadas, pueden ser insuficientes para contrarrestar, a corto plazo, los efectos negativos que producen las medidas de rigor y austeridad económica»²²⁶.

Las políticas económicas pueden ser objeto de discusión en cuanto a sus *consecuencias* y *costes*. Sin embargo, difícilmente se puede cuestionar, en nuestro caso, su dirección: “una política de rentas de redistribución a favor de beneficios, o como se denominará más o menos eufemísticamente, de recuperación del excedente empresarial”²²⁷. O dicho con otras palabras, quizás más gruesas, tan sólo una vez finalizado el proceso “autofinanciación e inversión” por parte del *capital* se podría crear empleo, asumiendo por esta vía explícitamente el marco de recuperación económico de la doctrina liberal²²⁸.

“Documento de estrategia”, octubre de 1983, sig. AI-647-08 pp. 32-ss. Y en cuanto a las relaciones con el sindicato hermano se vaticinaba: «Pero partiendo de este hecho, los socialistas no debemos prescindir del análisis de cuál es el papel de una organización sindical, incluida la UGT, en el contexto de la sociedad española, su autonomía en la determinación de su estrategia sindical y los intereses concretos que defiende, lo que implica que las relaciones con la UGT no van a estar exentas de discrepancias y diferencias que los socialistas debemos de asumir, en muchos casos, como autocríticas a nuestra propia acción como Partido». *Ibídem*, p. 34.

²²³ MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, p. 57.

²²⁴ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en *id.* (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 50.

²²⁵ Frase extraída de una publicación partidista enfocada, en lo básico, a la militancia y los cuatros medios: PSOE, “El Gobierno ante la crisis económica. Explicación de la política económica e industrial de los socialistas”. Largo documento de cerca de ciento cincuenta páginas aprobado previamente en una reunión de la CEF del PSOE en marzo de 1984. Publicación que ha de ubicarse dentro de una singular campaña por explicar y hacer comprender a los afiliados socialistas los porqués de su política económica. El documento partía de un doble objetivo. Por un lado, «que los militantes del Partido tengan un mayor conocimiento de la Política Económica», y por otro, desgranar una serie de justificaciones/argumentos con los que contrarrestar las crecientes críticas de otras fuerzas políticas, sindicales e inclusive sociales ante la *salida* a la crisis económica. Aunque el citado texto en sí aporta pocas novedades, vuelve a ser un compendio de los consabidos tópicos socialistas: necesidad de sacrificios y de solidaridad, la falta de alternativas viables y racionales... AHFPI, PSOE, “El Gobierno ante la crisis económica. Explicación económica e industrial de los socialistas”, Madrid, abril de 1984, sig. Fc381.

²²⁶ AHFFLC, PSOE-CE, “Documento de estrategia”, Madrid, octubre de 1983, sig. AI-647-08, p. 24.

²²⁷ ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “La política económica...”, *op.cit.*, p. 12.

²²⁸ Ambos términos serían empleados en un boletín interno de la ejecutiva socialista en marzo de 1985, tiempo en donde todavía no se vislumbraba la salida a la crisis económica, así como la posible

No sólo es que no se cuestionara, en momento alguno, la inserción dentro de los parámetros de la *nueva lógica* dominante –la denominada *búsqueda de la magia del mercado*– sino que con el fin de *generar confianza* en el seno del cuerpo empresarial²²⁹ se realizó una política de cuantiosas subvenciones –normalmente a fondo perdido²³⁰ y de dudosa “eficacia” en una economía de mercado²³¹– ayudas fiscales y otros incentivos destinados a “eliminar incertidumbres” del capital privado²³².

creación neta de empleo. En concreto, se remarcaba en aquel documento lo siguiente: «La recuperación del excedente empresarial favorecida por la reducción de los costes de explotación donde ha jugado un papel significativo la moderación salarial, no se ha traducido en inversiones que incrementen la capacidad productiva y por lo tanto que genere nuevos puestos de trabajo [...]. Estas dos fases de autofinanciación e inversión para la renovación, no se debe esperar un crecimiento del empleo, tan sólo cuando se acometa la tercera fase, donde el excedente empresarial generado en el saneamiento financiero e industrial anteriormente descrito, se destinará para inversiones que incrementen la capacidad productiva [...]. En dicho momento, cada peseta invertida podrá ser potencialmente generadora de empleo». AHFFLC, PSOE-CEF, “Comunicado Federal, nº 101”, Madrid, a 4 de marzo de 1985, sig. AI 469-03, p. 1. Un año después y cuando la creación neta de empleo comenzaba a darse aunque no con el ritmo ni la intensidad esperada, se repetirían los mismos argumentos en, PSOE, *Cuatro años cumplidos...*, *op.cit.*, pp. 14-15. Véase igualmente, PSOE, Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, “La política económica de los socialistas: balance de un ajuste solidario”, Madrid, 1986, sig. B 3482, pp. 25-ss. Una lectura crítica sobre este discurso economicista liberal en, AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, pp. 44-ss.

²²⁹ FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La construcción de..., *op.cit.*, p. 54. La consigna de *generar confianza* en los mercados tenía un único y simple objetivo: atraer la mayor cantidad posible de capital privado. «Para un partido como el PSOE, estas tareas tenían un objetivo adicional, abrir márgenes que permitieran generar un excedente con el que ser capaces de financiar la modernización económica y social de España». Id. “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 55. Por su parte Antonio García Santesmases –destacado dirigente del PSOE y miembro en su día de la corriente *Izquierda Socialista*– criticaría duramente esta deriva: «Una vez en el poder han redescubierto la magia del mercado y la retórica de la guerra fría». GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “El bienio socialista en perspectiva. Evolución ideológica del socialismo en la España actual” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 46.

²³⁰ «Las considerables subvenciones y ayudas a la actividad económica son medidas de carácter general que no establecen diferencias entre los capitales, según generen actividades sociales de mayor o menor interés, ni exigen nada a cambio a las empresas privadas beneficiarias. Se hacen, en general, a fondo perdido». ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 52. Parecida era la crítica de José Sevilla: «Una segunda cuestión relevante, si se hubiese definido definitivamente la necesidad de utilizar fondos públicos, consiste en dilucidar cuál es el título –y, en consecuencia la forma jurídica– bajo la cual se transmiten tales fondos, puesto que no resulta indiferente que tales fondos se transmitan en forma de préstamo –aun cuando fuese en condiciones de plazo y precio favorables al prestatario–, participación en el capital o que sean simplemente como subvención a fondo perdido». SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política de...*, *op.cit.*, pp. 114-115.

²³¹ Como explicaron en su día dos reconocidos economistas con respecto a las subvenciones estatales: «Tal socialización de costes llega, al extremo de las subvenciones a las empresas por empleo, distorsionando en consecuencia la asignación de recursos que surgiría del propio mecanismo de mercado. No deja de ser curioso que mientras que por un lado, en la política sector público-sector privado, se proclama la eficiencia del segundo por la utilización, que hace del mecanismo de precios; se acepte sin dudar la distorsión que ese mismo mecanismo introduce en la subvención al empleo». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, p. 74, *nota* 54.

²³² DORADO, Roberto, “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 61. Entre las primeras medidas

Ahora bien, a la hora de ponerle nombre y apellidos a la política económica que practicarían los gobiernos socialistas nunca se la calificaría de liberal, neoliberal, clásica, pro-capitalista. Aunque más adelante se volverá con mayor detalle sobre esta cuestión, quede aquí apuntado que los socialistas cuidarían interna y externamente este aspecto con todo tipo de detalles. Así pues, si a nivel político hablarían, por ejemplo, de los avances, de los éxitos, del socialismo democrático; en cambio, a la hora de referirse al campo de lo económico preferían distanciarse en lo epistemológico de los experimentos neoliberales anglosajones, con expresiones, términos, vocabulario del tipo de una política de ajuste solidario, una salida progresista a la crisis, una política de ajuste de lenta maduración...²³³.

6.2.2. El «gran enemigo» a batir: la inflación

La elección de la receta (neo)liberal para sanear y reestructurar la economía española, y en concreto de cara a conseguir los tan ansiados equilibrios macroeconómicos, se puede constatar, sobradamente, a través de los tres grandes objetivos establecidos en el ya citado *Programa Económico a medio plazo*. Veámoslos.

El primer objetivo que se marcó el *Programa* sería la reducción de la tasa de inflación que en aquellos momentos alcanzaba el 14%, mientras que en la Comunidad Económica Europea (CEE) la media se situaba en torno al 3,5%. Tema éste que se convertiría en una auténtica *obsesión* para gobernantes y técnicos socialistas²³⁴. “En cuanto al programa de saneamiento, se tomó conciencia de que la lucha contra la inflación es, más que una opción política económica, una cuestión de supervivencia de la sociedad”, señalaría en su día Juan E. Iranzo²³⁵. En la consecución de este objetivo se llevaría a cabo una *lectura técnico-política* mediante la utilización de una estricta política monetarista y de moderación salarial²³⁶. Una política con no pocos riesgos como bien sabían los economistas socialistas²³⁷.

adoptadas por el Gobierno estaría la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para los empresarios de cara a mejorar las condiciones y oportunidades de creación de puestos de trabajos: «La reducción en un punto y medio de las cotizaciones a la Seguridad Social es una decisión favorable para el empleo, en la medida en que disminuye los costes de los empresarios, al abaratar el total de la mano de obra». Entrevista a Joaquín Almunia en, PSOE, *Hacia el cambio...*, op.cit., p. 153. Entre otros posibles datos se han manejado los siguientes: «Los cálculos de la Unión General de Trabajadores sitúan en 1.626 billones de pesetas el volumen de recursos transferidos entre 1983 y 1987 desde el sector público a las empresas en concepto de subvenciones, bonificaciones y reducción de cotizaciones a la Seguridad Social». TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, op.cit., p. 194.

²³³ Asimismo se realizarían ímprobos esfuerzos teóricos y metodológicos, con escaso público entonces y ahora, para diferenciar el contenido de sus propuestas de lo practicado por lo que denunciaban como el *peligro neoliberal*. Entre otros ejemplos de esta política ‘explicativa’ y ‘didáctica’: AHFPI, PSOE, “El Gobierno ante la crisis económica. Explicación de la política económica e industrial de los socialistas”, Madrid, abril de 1984, Fc 381. Para las expresión ‘política de ajuste solidario’, AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria de gestión 1981-1984 [al] 30º Congreso, Madrid, 13-16 diciembre”, Madrid, PSOE-Comité organizador del XXX Congreso, 1984, sig. Fc 279, p. 12; y para la de ‘política de ajuste de lenta maduración’, PSOE, *Cuatro años cumplidos...*, op.cit., p. 13.

²³⁴ Consúltense, en primer lugar, las apreciaciones contenidas en, GAMBLE, Andrew y WALTON, Paul, *El capitalismo en crisis: la inflación y el Estado*, Madrid, Siglo XXI, 1997, así como todo lo remarcado en la primera parte de este Capítulo.

²³⁵ IRANZO, Juan E., “Economía y trabajo: la gran transformación de la sociedad española”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 100, (2002), p. 239.

²³⁶ BILBAO, Andrés, *Obreros y ciudadanos...*, op.cit., p. 44. Remarcaba el mismo autor como en esta asignación de prioridades la gran derrotada es la lectura *ético-política* sobre la cuestión del empleo/desempleo.

²³⁷ Como recordó en su día Francisco Ulburquerque «[c]omo quiera que la política económica predominante privilegia –casi como único objetivo fundamental– la atención al control de la inflación, y ello a través de instrumentos monetarios, el mantenimiento de los elevados tipos de interés consustanciales a dicha *política monetarista antiinflacionista*, conlleva también la *reducción de los*

Lo anterior conllevaría, según estas mismas lecturas liberales, que las subidas salariales conquistadas por los trabajadores en los últimos años, pasaban a formar parte, explícita o implícitamente, de los elementos macroeconómicos vinculados al aumento del desempleo y de la propia inflación. Una *idea-fuerza* que había tomado acomodo de lugar y que desde los *Pactos de la Moncloa* se había convertido en la guía central de los esfuerzos gubernamentales²³⁸. Según el argumentario liberal de la época, la extensión de la “cuestión social” se había transformado en el gran impedimento para recuperar la tasa de rentabilidad del capital privado²³⁹. Y con ello se estaba cuestionando antes que la propia legitimidad del sistema en su conjunto, las conquistas del movimiento obrero que habían ido en paralelo a la construcción de un siempre débil Estado protector. Lo que Robert Castel definiría como una “armonía frágil”²⁴⁰. Es decir, aparecía con toda su fuerza la contradicción fundamental del capitalismo: el conflicto capital/trabajo²⁴¹.

Aquello tendría su oportuna traslación al *lenguaje* del “nuevo consenso liberal” que todo lo media, todo lo evaluaba, en términos macroeconómicos, olvidándose a menudo de

niveles de inversión productiva ya que, alternativamente los ahorros encuentran en las aplicaciones financieras y/o especulativas una mayor rentabilidad, en esas circunstancias». ALBURQUERQUE, Francisco, “Una crítica al...”, *op.cit.*, p. 134 [*cursiva* en el texto original].

²³⁸ «Muy probablemente los salarios [...] han sido, y son, los protagonistas de la mayor parte de los análisis sobre la situación económica en nuestro país. Pudiéndose decir, casi sin temor a equivocarse, que prácticamente desde los emblemáticos Pactos de la Moncloa los salarios y su control se han convertido [...] en el elemento central sobre el que pivota toda la política económica española, de forma que quince años después la lectura mayoritariamente suscrita de la crisis española sigue confirmando a los mismos y a su control/moderación el papel determinante de la recuperación». MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Salarios, desempleo y calidad de empleo” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 163. Un aspecto de notable relevancia pues como señalaría Jordi V. Sevilla Segura: «[A] medida que desde 1977 ha crecido el poder relativo de la derecha, invirtiendo las tendencias registradas desde comienzos de la década pasada y por más que no hayan alcanzado los niveles de poder característicos de la época de plenitud del régimen anterior, la instrumentación del ajuste ha ido perfilándose por un camino diferente y mucho más directo: la reducción, simple y llanamente, de los salarios reales mediante el control de la tasa de crecimiento de los salarios monetarios». SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política...*, *op.cit.*, p. 111. Véase de forma monográfica todas estas cuestiones señaladas en el apartado “9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. *Los arduos inicios de la flexibilización* (octubre 1976-marzo 1980)”.

²³⁹ «[L]a política económica del PSOE, en nuestra opinión continuista en lo fundamental con la realizada desde 1978 por la UCD, tiene como objetivo el reconstruir las condiciones de producción (mejora de la rentabilidad del capital) con el propósito de producir un cambio en la tendencia en la inversión y a partir de ahí, a través de los conocidos efectos multiplicadores, poner en marcha un proceso de creación de empleo y crecimiento de la renta». ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO Rafael, “La política económica...”, *op.cit.*, p. 11.

²⁴⁰ CASTEL, Robert, *La metamorfosis de...*, *op.cit.*, p. 390. Téngase también presente aquí la definición de su tesis central: «Pero precisamente en el momento en que parecían haberse impuesto definitivamente los atributos ligados al trabajo para caracterizar el estatuto que ubicaba y clasificaba al individuo en la sociedad, en detrimento de los otros sostenes de la identidad (como la pertenencia familiar o la inscripción en una comunidad concreta), precisamente en ese momento, decimos, la centralidad del trabajo ha sido brutalmente cuestionada». *Ibíd.*, p. 389. Todo ello junto con lo ya explicado detenidamente en la *Presentación*.

²⁴¹ Beverly J. Silver en su brillante aportación describiría esta *contradicción fundamental* del capitalismo en tiempos de crisis: «Por un lado, la expansión de la producción capitalista tiende a reforzar a los trabajadores, y por lo tanto, enfrenta recurrentemente al capital (y a los Estados) con fuertes movimientos obreros. Las concesiones realizadas para poner bajo control a estos movimientos obreros tienden, a su vez, a hacer caer el sistema en una crisis de rentabilidad. Por otro lado, los esfuerzos del capital (y de los Estados) para restaurar los beneficios suponen invariablemente la quiebra de los bloques sociales establecidos y una intensificación de la mercantilización del trabajo, produciendo así la crisis de la legitimidad y reacciones de resistencia. Estas dos tendencias –crisis de rentabilidad y crisis de legitimidad– definen una tensión continua en el seno del capitalismo histórico». SILVER, Beverly J., *Fuerzas de trabajo...*, *op.cit.*, pp. 33-34.

aspectos políticos, sociales y humanos de no poca importancia. A saber, estamos ante la “burocratización del lenguaje político” del que hablara James Petras²⁴². O como también lo advirtiera Joaquín Estefanía, “el lenguaje económico no sólo del equipo técnico del Ministerio de Economía y Hacienda, sino también del propio presidente se acercaba mucho más a las recetas y pronósticos del FMI o de la OCDE que al contenido del programa con el que habían ganado las elecciones”²⁴³.

La permanente crítica, por ejemplo, del propio Miguel Boyer por el “crecimiento explosivo de los salarios” durante la segunda mitad de la década de los setenta, obedecía a una lógica unilateral y ortodoxa²⁴⁴. Pues, de hecho, no tenía presente que aquellas conquistas salariales no sólo eran la traducción de una serie de conquistas históricas del movimiento obrero –como también se ha adelantado en más de una ocasión– sino que, principalmente, respondieron a la necesidad “legitimar en la práctica el nuevo sistema dando respuestas eficaces a los problemas sociales y ampliando la base social del consenso constitucional”²⁴⁵. Es decir, el precio de la *integración* de la clase obrera en el sistema político y económico²⁴⁶. Pero es que además en la práctica resulta que durante,

«la década de los setenta se produce un aumento significativo de los costes laborales que, sin embargo, representó un aumento del poder de compra mucho menos dado ya que parte

²⁴² PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, *op.cit.*.

²⁴³ ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, *op.cit.*, p. 241.

²⁴⁴ BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, *op.cit.*, p. 84. «En los trece años que transcurren desde 1970 a 1982, los salarios reales crecieron acumuladamente un 13 por 100 en los Estados Unidos, un 37 por 100 en los países que hoy constituyen la Unión Europea y un 62 por 100 en España». *Ibidem*, p. 85. José María Maravall también ha insistido en esta tesis achacando la responsabilidad a la incapacidad de los últimos gobiernos de la dictadura, así como de los posteriores de la UCD: «Entre 1970 y 1982, los costes laborales por persona crecieron en un 190 por 100 en términos reales, mientras que de 1970 a 1980 dichos costes aumentaron cuarenta puntos por encima de la productividad [...]. Una dictadura en crisis fue incapaz de adoptar decisiones necesarias para ajustar la economía española a la nueva situación de la economía internacional: posteriormente, durante la transición, la política tuvo prioridad sobre la economía». MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia...”, *op.cit.*, p. 44. Una visión en esta línea, TOHARIA CORTÉS, Luis, “La tasa agregada de beneficios y el crecimiento de los salarios en la economía española, 1964-79”, *Revista Española de Economía*, vol. X, n° 3, (1980), pp. 75-88. Otros políticos socialistas llegarían a hablar del *látigo salarial*: ESPINA, Álvaro, “Diez años en la vida de España. Las políticas laborales y de empleo” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 449.

²⁴⁵ BANDRÉS, Eduardo, “Gasto público y estructuras del bienestar: el sistema de protección social” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 637. Por su parte Julio Alcaide Inchausti tras calificar de «excepcionalmente intenso» el «cambio en el reparto de la renta española» durante estos años, señalaría como al producirse en un contexto de crisis económica la «más alta asignación de renta a los tramos de población menos favorecida vino propiciada por la expansión de las prestaciones sociales y el aumento de los costes del factor trabajo. El efecto nocivo sobre el déficit público y la caída del ahorro empresarial fue su consecuencia inevitable». Para a continuación indicar como dicha situación «más equitativa de distribución personal de la renta española en 1980, lograda a través de un proceso económico regresivo y de reivindicaciones sociales crecientes, tuvo un efecto económico y social pernicioso, que se reflejó en el acrecentamiento del déficit, la caída del ahorro y la inversión y el aumento del paro». ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, “Distribución sectorial, personal y factorial de la renta” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, pp. 475 y 476, respectivamente. Véase asimismo, FINA, Lluís, “Salarios y política de salarios. Unas notas sobre la experiencia española”, *Cuadernos de Economía*, vol. IX, n° 25, (1981), pp. 481-488.

²⁴⁶ Consúltense nuevamente los argumentos expresados en, SILVER, Beverly J., *Fuerzas de trabajo...*, *op.cit.*, pp. 169-ss. Revísese aquí las tesis mantenidas en el trabajo de, WAISMAN, Carlos H., *Modernización y legitimación...*, *op.cit.*, junto con lo apuntado en la *Presentación*, nota 121.

del aumento fue debió a la creciente presión fiscal sobre los trabajadores y al aumento de las cotizaciones sociales»²⁴⁷.

No terminan aquí los problemas de fondo con respecto a esta cuestión. Lo destacó en su día Jordi Roca cuando hablaba de la “escasa fiabilidad de la mayoría de estadísticas económicas españolas”²⁴⁸:

«Los organismos oficiales y oficiosos [propensos] a considerar a los trabajadores como los principales responsables de los problemas económicos (léase el Servicio de Estudios del Banco de España o la línea dominante de la revista *Papeles de Economía Española*) han utilizado, desde luego, argumentos ‘técnicos’; algunos más sensatos y otros menos, pero en cualquier caso [...] dichos argumentos se han utilizado de forma sesgada y oportunista, como argumento *ad-hoc* utilizados cuando permitían argumentar a favor de la moderación salarial y abandonados cuando no eran ‘funcionales para dicho argumento’»²⁴⁹.

²⁴⁷ ROCA, Jordi, “Evolución de los salarios y evolución del discurso «oficial» sobre los salarios” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 197. Y concluía de la siguiente forma: «[D]urante los setenta sí se produce un aumento de los costes laborales unitarios reales pero es muy moderado y le sigue una caída mucho más importante en la década posterior, tanto en plena crisis económica como en los años de expansión. En definitiva, los costes laborales unitarios reales en el año 1991 eran considerablemente inferiores –en más de un 10%- a los de 1970». *Ibíd.*, p. 201. A pesar de todas estas evidencias no se dejaría de insistir desde el mismo Gobierno como incluso en los peores años del ajuste económico se produjeron *aumentos salariales reales*. «Es posible que haya existido esa racionalización, pero la verdad es que cuando consideras todos los deslizamientos, quitando 1984, en todos los demás años hay aumentos salariales reales. Lo hay en 1983, lo hay en 1985 y lo hay en 1986». Declaraciones de Carlos Solchaga en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 156. Otros dirigentes socialistas llegarían a declarar como los «datos sugieren que los salarios no sufrieron una erosión apreciable». DORADO, Roberto, “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 62. Declaraciones que no coinciden con las cifras que ofreciera años más tarde el que fuera Secretario General de Empleo, Álvaro Espina: +2,2% para 1983; +0,1% para 1984; -0,2% para 1985; y -0,7% para 1986. ESPINA, Álvaro, *Empleo, democracia y...*, *op.cit.*, pp. 262-ss. El mismo autor llegaría a señalar un año más tarde lo siguiente: «La vuelta a tasas de crecimiento modestas del nivel general de los salarios reales por persona no significa, sin embargo, restricción alguna para el aumento del nivel de vida de la población. Más bien ocurre lo contrario». ESPINA, Álvaro, “Diez años en la vida de España. Las políticas laborales y de empleo” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 247. Más concreto y del todo aclaratorio el trabajo de, ALBARRACÍN, Jesús y ARTOLA, Concha, “El crecimiento de los salarios y el deslizamiento salarial en el período 1981 a 1988”, *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 9001, (1990).

²⁴⁸ Véase lo apuntado previamente en, “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

²⁴⁹ ROCA, Jordi, “Evolución de los salarios y evolución del discurso «oficial» sobre los salarios” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 203. A modo de ejemplo citaba un artículo que en su momento tendría una enorme importancia en la formación del *nuevo consenso mayoritario*: ROJO, Luis Ángel, “Desempleo y factores reales”, *Papeles de Economía Española*, nº 8, (1991), pp. 124-136 [véase también aquí, MARTÍN ACEÑA, Pablo, “Los estudios de macroeconomía en España: Las enseñanzas del profesor Rojo” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, *op.cit.*, vol. VII, pp. 525-550]. Más tarde esta argumentación sería continuada por, MALO DE MOLINA, José Luis, “La medición de la productividad activa” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, *op.cit.*, vol. I, pp. 593-598. Argumentos, tesis, hipótesis... defendidas, informe tras informe anual, por el Banco de España [consúltese, por ejemplo, años ya más tarde, SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA, *La política monetaria y la inflación en España*, Madrid, Alianza, 1997]. Por lo demás, en torno a la *fiabilidad* de las estadísticas sobre los salarios véanse entre otros: LORENTE, José Ramón y FRÍAS, José, “Las estadísticas salariales: metodología y análisis crítico”, *Información Comercial Española*, nº 580, (1981), pp. 87-98; así como el informe del, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Metodología de la Encuesta de Salarios*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1982. Para un estado de la cuestión sobre el tema, BANDRÉS, Eduardo, “Gasto público y estructuras del bienestar: el sistema de protección social” en GARCÍA DELGADO, José

Por esta misma vía, cuando menos, debe cuestionarse seriamente la fundamentación empírica sobre la que giraron de forma continuada los argumentos/pretextos gubernamentales en relación a este vital asunto. Joaquín Almunia, el Ministro de Trabajo, expone en una conferencia en el selecto Club Siglo XXI esta cuestión de manera extraordinariamente clara:

«La moderación en el crecimiento de los costes laborales debe contribuir a mejorar el excedente empresarial, o si se quiere expresar en otros términos, los beneficios brutos de las empresas, antes de impuestos. No creo que a estas alturas pueda nadie asombrarse de que esta afirmación salga de los labios de un miembro del Gobierno socialista. En efecto sólo a través de la generación y mejora del excedente empresarial podrá financiarse una parte sustantiva de la inversión y remunerar el ahorro, atrayendo así nuevos recursos para ser canalizados hacia la inversión [...]. El objetivo de la moderación salarial es, por sus múltiples repercusiones sobre el conjunto de la economía, uno de los nudos gordianos para orientar la salida de la crisis hacia un crecimiento creador de empleo. La reducción de la presión inflacionista que tal objetivo hace posible, opera también sobre la competitividad de las exportaciones y puede incluso atraer inversiones de capital exterior, hechos ambos que debieran mejorar el equilibrio de nuestra balanza y dinamizar el propio crecimiento»²⁵⁰.

La *idea* de “apretarse el cinturón” pasaba a considerarse el primer obligado *sacrificio*. En tanto, “la moderación salarial se convertía en un requisito igualmente imprescindible para contener la inflación y hacer mejorar el empleo, lo que le dotaba de una mayor fuerza persuasiva, dada la sensibilidad social por el problema del paro”²⁵¹. En aquel mismo contexto los eufemismos se impusieron. Se trataba, en palabras del propio Joaquín Almunia, de “beneficiar a los trabajadores españoles”.

«¿Cuál es por tanto la política que se propone? ¿Se trata de una receta más, de las tan en boga, según la cual los salarios serían los culpables de la crisis y habría por tanto recaer su coste sobre ellos y sobre los trabajadores? No es esa desde luego mi opinión; antes al contrario, pienso que la opción que estoy exponiendo es profundamente beneficiosa para los trabajadores españoles. Lo que sucede es que como socialista, no comparto las prevenciones conservadoras frente a la actuación del Estado»²⁵².

Lo cierto es que entre consignas, recetas y demás eufemismos, lo que quedaba esbozado era un planteamiento, con sus correspondientes falacias, de la escuela (neo)clásica. Como acertó a observar el destacado economista Juan Torres López se partía de una concepción errónea – consciente o no – del salario,

«pues se limita a considerarlo solamente como una componente del coste empresarial (en cuya condición puede condicionar la demanda de trabajo a realizar, aunque no de forma absoluta, pues ésta va a depender del volumen de ganancia esperada) cuando, además, es una componente de la demanda global que condiciona a su vez la ganancia esperada por las empresas y también un determinante de la productividad»²⁵³.

Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 459, *nota 2*. Por lo demás, véase el amplio apartado, “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

²⁵⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Acción Sindical, ALMUNIA, Joaquín, “Las relaciones laborales y la crisis económica”, Madrid, 26 de enero de 1984, sig. AI 502-003, pp. 21-22.

²⁵¹ SERRANO SANZ, José M^a, “Crisis económica y transición política” en REDERO SAN ROMÁN, Manuel (ed.), *La transición a...*, *op.cit.*, p. 161.

²⁵² AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Acción Sindical, ALMUNIA, Joaquín, “Las relaciones laborales y la crisis económica”, Madrid, 26 de enero de 1984, sig. AI 502-003, pp. 22-23.

²⁵³ TORRES LÓPEZ, Juan, “Sobre las causas del paro y la degeneración del trabajo”, *Sistema*, n^o 151, (1999), p. 45. El mismo autor en otra publicación junto con otros afirmaría: «[P]arace más realista [...] que la causa de las tensiones inflacionistas radica mejor en la concentración que caracteriza a los mercados, especialmente en el ámbito de la distribución y comercialización, en la falta de competencia [...] en la especulación y en la política de encarecimiento del crédito que favorece a los grandes intereses bancarios». TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 37.

Más allá de lo que se esbozará en los siguientes apartados que componen este III Epígrafe, entre los índices que se han venido construyendo en torno al asunto uno puede ser realmente ilustrativo para explicar la “otra cara” de esta política: el Índice Agregado de Costes Laborales por Unidad de Productos en Términos Reales (CLUR)²⁵⁴. Un índice estadístico que nos posibilita matizar los anteriores argumentos. Según los datos que aporta el CLUR entre 1970 y 1977, resulta que los costes laborales crecieron un 3,5%. A medio plazo aquello significó un crecimiento moderado. Asimismo debe de tenerse en cuenta que tras los *Pactos de la Moncloa* aún se redujo más tal “coste”. Por tanto, de cara a examinar la relación entre inflación y salarios se deben recurrir a otros argumentos como el ofrecido por el propio Jordi Roca:

«[E]n otras palabras, los fuertes aumentos de los costes salariales monetarios por unidad de producto –tanto en su componente de salario neto como de cotizaciones sociales e impuestos– fueron básicamente trasladados a los precios. La desaceleración posterior del ritmo de crecimiento de los costes laborales unitarios no fue acompañada, en cambio, de una reducción de la inflación de la misma intensidad: los CLUR fueron en 1984 inferiores a los de 1970 y, en conjunto, entre 1977 y 1988 se produjo un descenso en torno al 13%; no era otro el objetivo de la política de rentas: disminuir o, como mínimo, mantener el coste laboral real por persona de forma que las empresas se apropiasen de las ganancias de productividad y así aumentasen los excedentes empresariales»²⁵⁵.

Además aquellas medidas se vieron altamente recompensadas por los aumentos de la productividad cuando no por el alza de precios, con lo que la rentabilidad del capital en momento alguno, y excepto en los picos más agudos de la crisis económica, se vio dañada²⁵⁶. Mientras tanto, contrastada aquella denodada lucha contra la inflación, con la permisividad y tolerancia que se mantuvo con respecto a la *economía sumergida*²⁵⁷. Actividad fraudulenta e ilegal que venía patrocinando sin vacilaciones el mundo empresarial desde el franquismo en un contexto de crisis y de desempleo, y por tanto de *chantaje impune*²⁵⁸. Una tolerancia que llegaría a extremos impensables con los propios gobiernos socialistas bajo el *argumento progresista* de que, a pesar de todo, la economía sumergida ayudaba a absorber mano de obra²⁵⁹. A lo que

²⁵⁴ El CLUR es un índice, tal como ha explicado Jordi Roca, que compara «la evolución de los salarios deflactados por el promedio de la producción interna (que consideramos el ‘coste de los factores’, es decir, antes de impuestos) con la productividad». ROCA, Jordi, “La distribución de la renta entre las clases sociales” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., pp. 607-608.

²⁵⁵ *Ibidem*, pp. 611-612.

²⁵⁶ Véase aquí, TAFUNELL, Xavier, “Los beneficios empresariales en España (1880-1981): estimación de un índice anual del excedente de la gran empresa”, *Revista de Historia Económica*, vol. XI, nº 2, (1998), pp. 367-383.

²⁵⁷ «¿Hasta qué punto caló esta tolerancia en la sociedad española?» es la pregunta que trató de responder el estudio de, RUESGA, Santos M., *Los españoles ante la economía sumergida: informe (resultados del estudio 2249)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1997. Por su parte Miren Etxezarreta criticaría duramente esta política: «Es ‘comprensible’ que los empresarios aprovechen las ventajas de una semiclandestinidad tolerada, ya que esto les permite ‘ser competitivos’. Sin embargo, esta tolerancia se produce únicamente respecto a la parte empresarial, mientras se acusa con dureza a aquellos trabajadores que, cobrando un subsidio de desempleo [...] complementan sus ingresos trabajando en la economía negra. Tampoco existe una mínima preocupación por las condiciones de trabajo o el bajo nivel de las remuneraciones en esta modalidad laboral». ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 54.

²⁵⁸ Muy significativo en este sentido, BARCIELA, Carlos Fernando, “Fraude fiscal y mercado negro durante el primer franquismo” en COMÍN, Francisco y ZAFRA, Juan (eds.), *El fraude fiscal...*, op.cit., pp. 367-381.

²⁵⁹ En aquel mismo contexto –entonces de crecimiento económico– comenzaba a hacerse común un discurso, al mismo tiempo, *conservador* como *liberal*, que atacaba a los propios trabajadores en situación de subsidio de desempleo por su propia situación. De hecho, esta situación sería reconocida en múltiples ocasiones, a nivel interno, por el PSOE aunque sin mayores autocríticas que las oportunas.

sumaría en el tiempo la permanente tentación de explicar/justificar como las tasas de desempleo “oficiales” debían matizarse seriamente ante la magnitud de este fenómeno, en lo que se transformaría en una continuada muestra de falta de atención y de interés por este importante problema económico-social, a la par que de interesada manipulación²⁶⁰.

No es baladí esta cuestión, pues si la lucha contra el fraude fiscal sería de dudosa eficacia estando siempre sometida al escrutinio de determinados poderes económicos²⁶¹; la misma situación se repitió con respecto al trabajo en *negro* de tan larga tradición nacional. La publicación del conocido informe *Análisis de las condiciones de vida y trabajo en España* en 1988, por parte de la Secretaría General de Economía y Planificación del Ministerio de Economía, tras cerca de dos años de elaboración de estudios, y precedido por un debate parlamentario en el Congreso de Diputados²⁶²; evidenció en pleno *boom económico* las paupérrimas condiciones de trabajo (bajos niveles de ingresos, pluriempleo, falta de cobertura, fraude, temporalidad...) para un alto sector de la población asalariada²⁶³. El que se conoció

Veamos que decía a la altura de 1985. «El origen del menor incremento de la población activa puede encontrarse, como establece el Informe de Coyuntura Económica de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, en el crecimiento de la economía sumergida». AHFFLC, PSOE-CEF, “Comunicado Federal, nº 101”, Madrid, a 4 de marzo de 1985, sig. AI 469-03, pp. 2-3 [véase aquí durante estos años los informes de 1985, 1986 y 1987 y 1988 del, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Mercado de trabajo en España durante... Coyuntura y programas de actuación*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social]. La situación no varió en un plano, digamos, *positivo* en los siguientes años. Antes al contrario bien puede señalarse que evolucionó en un sentido negativo. Tres años más adelante en el XXX Congreso del PSOE, los socialistas solicitaban, en ningún caso exigían, a los empresarios la posibilidad –garantizadas unas determinadas condiciones de impunidad– de «motivar a los sectores que hoy actúan en la economía sumergida a emerger, sin que pierdan por ello su flexibilidad y competitividad». AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 45.

²⁶⁰ Como destacaron dos prestigiosos economistas: «[R]esulta cuando menos irónico que la institución social encargada de imponer la legalidad quite importancia al fenómeno del desempleo acudiendo a la existencia de la economía oculta/ilegal, pues su propia existencia no revela sino la impotencia del propio gobierno, tanto a la hora de hacer cumplir las leyes como a la hora de realizar una política económica que posibilite la generación de puestos de trabajo en condiciones legales. En segundo lugar, y aunque el volumen de ‘empleo’ en la economía oculta está sujeto a debate lo que sí parece estar claro a partir de la información disponible es que los participantes en este mercado paralelo de trabajo difícilmente podrían encuadrarse en otra clasificación que no fuera la de desempleo involuntario». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, pp. 25-26.

²⁶¹ Véase aquí sobre las *idas y venidas* de la reforma fiscal en la primera legislatura socialista en el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”, y en concreto véase el destino final tanto del primer proyecto de ley contra el fraude fiscal así como de su autor –José V. Sevilla– a principios del año 1984.

²⁶² El debate tuvo lugar el 17 de octubre de 1986. Véase, CORTES GENERALES, *Debates parlamentarios sobre empleo y economía irregular (1986-1988)*, VII vols., Madrid, Congreso de los Diputados / Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General / Gabinete de Publicaciones, 1988.

²⁶³ La publicación del trabajo firmado por, DIOS MURO, Juan de, RAYMOND, José Luis L., TOHARIA, Luis y URIEL, Ezequiel, *Análisis de las..., op.cit.*, y en concreto el epígrafe, “V.4. Empleo irregular según la tipología de la relación laboral” (pp. 118-121), marcaría un punto de inflexión. Realizado a través de una de las encuestas más completas y más perfeccionadas metodológicamente en aquel tiempo, aunque no se llegara a una explotación total de los datos, el *informe* puso blanco sobre negro algunos aspectos fundamentales de la precaria situación de la economía española, que normalmente no aparecían reflejados en las grandes estadísticas del INE. Partiendo de varios estudio previos –entre ellos, el informe no publicado, “Condiciones de vida y trabajo en España”, Madrid, 1986, o el publicado al año siguiente, RUESGA BENITO, Santos M. (comp.), *Economía oculta y mercado de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987– junto con los datos aportados por la “Encuesta sobre las Condiciones de Vida de los Españoles” a partir de noviembre de 1985, aquel libro sacó a la luz cómo

popularmente como el *Informe Solchaga* “demostró que había casi 3 millones que eran parados falsos”²⁶⁴. Como en tantas otras ocasiones tras los titulares de prensa correspondientes, y los alegatos a favor de reconducir esta situación, dicho problema socio-laboral continuaría en el tiempo hasta hoy agravándose al combinarse con la temporalidad/precariedad²⁶⁵.

entre un 20% y un 30% de la población española substituía a través de la economía sumergida. Véase también el esfuerzo teórico y metodológico en esta dirección del, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Problemas estadísticos de la economía sumergida* [Jornadas para el estudio de los problemas estadísticos de la economía sumergida], Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1986, así como el trabajo de síntesis, ARAMAYO, José Luis, DIOS MURO, Juan de, TOHARIA, Luis y URIEL JIMÉNEZ, Ezequiel, “La Encuesta de Población Activa y la Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, op.cit., vol. III. Entre la multitud de estudios disponibles sobre la economía sumergida, nos remitimos a los seis siguientes de cara a una visión de conjunto: JÓDAR, Pere y LÓPE PEÑA, Andreu, *Con el agua al cuello. El trabajo en la economía sumergida*, Madrid, Revolución, 1985; RECIO, Albert, “Economía sumergida y transformación de las relaciones laborales en España”, *Papers*, nº 27, (1986), pp. 131-154; RUESGA BENITO, Santos M., *Al otro lado de la economía: cómo funciona la economía sumergida en España*, Madrid, Pirámide, 1988; GALLEGO, Carmen, “Economía sumergida y mercado de trabajo: aproximación histórica”, *Acciones e investigaciones sociales*, nº 3, (1995), pp. 19-32; YBARRA, Josep-Antoni, *Economía sumergida: el estado de la cuestión en España*, Murcia, Y.A. Ybarra, 1998; AMANDO, Miguel de, *España oculta...*, op.cit.; YBARRA, Josep Antoni, SAN MIGUEL, Begoña y HURTADO, Jorge, “La economía sumergida en España: un viaje sin retorno”, *Sistema*, nº 168-169, (2002), pp. 247-282. Por último, consúltense buena parte de los trabajos de un libro tan desconocido como valioso, BAYLOS, Antonio [et al.], *Nuevas tecnologías y clase obrera*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1989, y en concreto los textos contenidos en el epígrafe: “I. Precarización y economía sumergida”. Complementétese esta bibliografía con lo apuntado en el Capítulo 2 en la *nota 148* entre otras.

²⁶⁴ COLECTIVO IOE, “Características de la desigualdad en el Estado español” en *La sociedad de la desigualdad: pobreza y marginación a debate* [Jornadas organizadas por el sindicato ESK-CUIS], Donostia, Tercera Prensa, 1992, p. 30. Un trabajo en el que además se señalaba lo siguiente: «[L]a cuarta parte de todo el mercado nacional está en la economía sumergida. Tras esta cuarta parte hay toda una serie de familias, personas dependientes que pueden suponer 6 o 7 millones [...] todos los que están en la economía sumergida están en situación de precarización y de falta de cobertura y falta de seguridad y derechos laborales». Ibídem. Por su parte para Carlos Solchaga aquel informe constituiría la más firme demostración, sin entrar en más detalles sobre los ámbitos de ilegalidad sobre los que se asentaba la contratación en negro, de que el desempleo en España estaba ‘sobrevalorado’: «A poco tiempo de llegar al Ministerio de Economía y Hacienda, el entonces secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, me presentó las conclusiones de una llamada ‘encuesta de condiciones de vida y de trabajo en España’, que trata de evaluar de manera cuantitativa cuál era el empleo ‘sumergido’ en la economía irregular en nuestro país [...]. Según aquella encuesta, el empleo en España podía estar infravalorado significativamente y el paro aumentado en 5 puntos sobre la realidad en las estimaciones de la Encuesta de Población Activa. Esta fue la primera vez, que yo conozca, que se puso en cuestión la bondad de las estimaciones de la EPA». SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, op.cit., p. 160. Por su parte como se recordaría desde la UGT: «Esta encuesta, que pretendía demostrar el elevado volumen de fraude en la percepción de la cobertura de desempleo, situó el total de fraude en la ocupación en un 21% del cual el 5% correspondía a cobertura y el 90% a fraude empresarial en el pago (impago) de las cotizaciones sociales. Sin embargo, éste último no parecía ser tan importante para quienes habían abierto esta polémica». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al XXXV Congreso Confederal”, Madrid, 1990, sig. 0067-001, pp. 320-321.

²⁶⁵ Escasas fueron las autocríticas reales, a nivel externo, por parte de los principales dirigentes tanto del Gobierno como del Partido con respecto a este asunto y otros tantos relacionados con el proceso del ajuste ‘solidario’. Entre éstas debe destacarse las moderadas y aisladas declaraciones en el Círculo de Bellas Artes por Joaquín Leguina en octubre de 1987, quien señalaría: «Por otro lado, en el conjunto de la sociedad existen hoy signos de que, la distribución personal y funcional de la renta no es más equitativa que hace cinco años. Por el contrario, las diferencias, probablemente, se han agrandado». AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Sindical, Joaquín Leguina, “El discurso socialista en la encrucijada”, Madrid, octubre de 1987, sig. 002906-005, p. 16. En cambio, desde la UGT se atacaría duramente las consecuencias políticas de este debate así como la ineficacia real del mismo: «Al hilo de la nueva encuesta [Encuesta de Condiciones de Vida y de Trabajo] se produjo un debate en el Congreso de los Diputados [...] sobre la economía sumergida que favoreció por parte de la derecha incursiones

Retornando a nuestro asunto, la moderación de los salarios, por tanto, se constituyó en el “pilar fundamental”²⁶⁶ de aquella estrategia económica, al permitir que el crecimiento de los mismos se redujeran de tasas del 20% a menos de 5% durante la década de los ochenta²⁶⁷. Su mayor costo fue la progresiva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En datos constantes y sonantes la citada política de moderación salarial –siempre calificada como “ligera”, “moderada”... por parte de los socialistas²⁶⁸ y directamente como “eficaz” por la UGT durante buena parte de la primera legislatura socialista²⁶⁹– supuso una reducción de la participación de la remuneración de los asalariados en relación al PIB de 5,24 puntos entre 1977

ideológicas desmanteladoras de la protección social y desreguladoras de la normativa laboral [...]. La intervención de U.G.T. en este debate fue crucial para resolverlo de un modo positivo [...]. Tras el debate, la beligerancia sobre el tema desapareció. El acuerdo del Parlamento no se ha traducido en un desarrollo de actuaciones y de todo aquello tan sólo queda la beligerancia inicial contra la situación de nuestros desempleados, que la propia encuesta contradecía al evaluar el colectivo que incurría en fraude en una cifra insignificante». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al XXXV Congreso Confederal”, Madrid, 1990, sig. 0067-001, p. 321.

²⁶⁶ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 35.

²⁶⁷ Esta política de moderación salarial sería calificada desde la academia liberal como *meritoria* aunque *insuficiente*. Por ejemplo, Enrique Fuentes Quintana y Jaime Requeijo indicarían: «El ajuste, desde el lado de los costes de producción, ha sido notable en el factor trabajo, ya que el coste unitario se ha reducido el 50 por 100 del precedente, situándose en torno al 5 por 100. Tasa todavía superior a la comunitaria, pero que refleja el esfuerzo de ajuste practicado». FUENTES QUINTANA, Enrique y REQUEIJO, Jaime, “La larga marcha...”, *op.cit.*, p. 30.

²⁶⁸ En este sentido, desde la llegada al Gobierno hasta el denominado ‘giro social’, este tipo de *calificaciones* serían mayoritarias para describir la política de rentas, en todos y cada uno de los documentos socialistas, públicos o no. A modo de ejemplo, AHFPI, PSOE, Secretaria de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, “La política económica de los socialistas: balance de un ajuste solidario”, Madrid, 1986, sig. B 3482. A buen seguro dicho texto al que nos estamos refiriéndonos, constituya uno de los ejemplos más definidos del empleo de este ‘lenguaje político’ –y probablemente, como se dijo, el mismo sería redactado por Fernández Marugán– junto con las permanentes reflexiones y argumentos metodológicos para desestimar, rechazar, en suma, que durante estos años el conjunto de trabajadores perdieran capacidad adquisitiva: «La caída en la renta disponible para el gasto de los particulares originada por la moderación de los salarios reales, y sobre todo, por la fuerte reducción del nivel de empleo durante el periodo explican el retroceso del consumo privado nacional, y por extensión de la demanda interna. La ligera pérdida de poder adquisitivo registrada ha debido ser inferior a lo que cabría en principio deducirse de la variación porcentual media detectada en los convenios colectivos, puesto que esta estadística refleja sólo una tabla salarial sobre la cual tiene lugar un proceso de deslizamiento medio que, por lo general oscila entre uno y dos puntos adicionales sobre la citada tabla salarial». *Ibídem*, p. 15.

²⁶⁹ «La política salarial, basada en bandas de negociación con límites mínimos y máximos y cláusula de revisión, ha constituido un instrumento eficaz de lucha contra la inflación a través de la contención de los salarios pero a la vez ha permitido la defensa del poder adquisitivo global de los trabajadores». AHFFLC, UGT, “Informe de gestión presentado por el Secretario General al XXXIV Congreso”, Madrid, 2-6 de abril 1986, sig. 001635-007, p. 19. Muy poco tiempo después, en concreto a la salida del XXXIV Congreso de la UGT, y ante las evidencias cada vez más serías sobre la involución de los salarios, ya se comenzarían a introducir matices por parte de la UGT. Así entre sus objetivos básicos se señalaba: «Una política de rentas que aumente la capacidad de consumo de los niveles medios y bajos y que garantice, cuando menos, el mantenimiento del poder adquisitivo». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de gestión presentado al I Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 3 y 4 de octubre de 1986, sig. ant. D/15/23 p. 5. Discurso que se vería modificado sustancialmente en su siguiente congreso: «[E]stas erróneas previsiones han supuesto un elemento perturbador en la negociación colectiva y han acarreado importante conflictividad, sobre todo en el sector público. Una acción sindical decidida y la mejora correlación de fuerzas hicieron posible, pese a todo, que las rentas que han podido negociar los sindicatos hayan logrado incrementos, muy moderados, del poder adquisitivo». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al XXXV Congreso Confederal”, Madrid, 1990, sig. 0067-001, p. 17.

y 1985²⁷⁰. En paralelo, y he aquí un elemento para interpretar el posterior debilitamiento de la fuerza de acción del movimiento obrero encabezado por UGT y CCOO, se produciría una fuerte apertura de los abanicos salariales –por ejemplo, entre 1980 a 1988 el citado abanico salarial aumentaría un 35% de media²⁷¹– que se acentuaría de forma constante durante los siguientes años, rompiéndose, de hecho, con el proceso de concentración característico del periodo de la transición postfranquista²⁷². Todo un “éxito” en palabras de Jesús Albarracín²⁷³.

²⁷⁰ Datos concretos y específicos sobre la cuestión salarial en el apartado “8.1. ¿El gran salto adelante?”.

²⁷¹ ROCA, Jordi, “La distribución de la renta entre las clases sociales” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del..., op.cit.*. Y a nivel de los países de la OCDE, BOTWINICK, Howard, *Persistent Inequalities. Wage disparities under Capitalism Competition*, Princeton, Princeton University Press, 1993.

²⁷² Aunque todas estas cuestiones se verán en el Capítulo 7 y en el Capítulo 8 dentro de este III Epígrafe, queden aquí ya reflejados unos datos que ofreció el INE para los años que medían entre 1981 y 1989. El salario medio de un obrero –medido a través de la ganancia media mensual entre aquellos años y con la constante en pesetas del año 1983– en 1981 se situó en 72.899 ptas. Y en 1989 éste había descendido a 71.644 ptas. El otro gran parámetro para desmentir muchos de los argumentos (neo)liberales son los relativos al SMI, que pasa del 38% con respecto al salario medio en 1980 hasta descender al 28% en 1991. Todo ello tendría un negativo efecto en la evolución salarial, tal y como se señalaba en un informe del Instituto Sindical de Estudios –vinculado a la UGT– en 1991: «Las pérdidas continuas han ocasionado la apertura de abanicos salariales, han potenciado los bajos salarios de incorporación de muchos trabajadores temporales y, en definitiva, han reforzado los factores depresivos sobre los salarios». AHFFLC, Instituto Sindical de Estudios, “Informes sobre coste y política de rentas”, Madrid, febrero 1991, sig. 001600-10, p. 9. Datos en mano, sin embargo, las opiniones de destacados dirigentes socialistas eran bien distintas: «La evolución del salario mínimo interprofesional en los años de Gobierno socialista denota una leve ganancia de poder adquisitivo después de diez años». MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-equidad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del..., op.cit.*, p. 215. Las críticas y valoraciones sobre los salarios y concretamente sobre el SMI –de gran valor para conocer el nivel de renta medio de un país– no terminaban ahí. Iban más lejos. «En particular, creo que será necesario reducir el periodo de cobertura del desempleo –no necesariamente el nivel de prestación en comparación con el salario–; seguir bajando las cotizaciones sociales para los trabajadores menos cualificados y quizá también el Salario Mínimo Interprofesional para los jóvenes; descentralizar mucho más la negociación colectiva pasándola tanto como sea posible al nivel de empresa, tipificar de forma más clara las causas de los despidos y establecer un tope a su coste». SOLCHAGA, Carlos, *El final de..., op.cit.*, p. 179.

²⁷³ ALBARRACÍN, Jesús, “La extracción del excedente y el proceso de acumulación” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del..., op.cit.*, p. 327. Asimismo el autor aportaba otros datos que avanzaban en la misma línea. Por ejemplo, se mantenía en ese trabajo como los salarios habían disminuido su participación en la riqueza nacional en su conjunto. De modo que, si el salario medio de 1977 constituía el 68,3% de la riqueza nacional ya en 1989 esta cifra había bajado a 58,7%. El autor concluía al respecto: «Desde 1979, los salarios reales han crecido por debajo de la productividad, incluso utilizando las cifras oficiales que, como se han visto, deben someterse a seria revisión. Esto significa que, desde esa fecha, lo que los trabajadores han retirado del flujo circular de la renta (sus salarios reales) han crecido menos que lo que han aportado (su productividad)». *Ibidem*, pp. 336 y 328, respectivamente. Por otro lado contamos con otros dos datos estadísticos oficiales que nos clarifican este panorama: entre 1985 y 1991 los Costes Laborales Unitarios Reales en España se redujeron un 10,2%, frente al 3,4% de la media de la CEE; y en segundo término, durante ese mismo periodo de tiempo mientras que la remuneración real por asalariado crecía en España el 6,6% acumulado, en el conjunto de la CEE el incremento fue del 13,6%. Datos extraídos de, AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Sindical, “Claves para una orientación más eficiente de la política económica”, Madrid, 20 de noviembre de 1992, sig. 001833-001, pp. 26-27. No obstante, la opinión del PSOE era bien diferente una vez más. Así señalaba en 1990 como «los descensos conseguidos en la inflación han posibilitado que la retribución de los asalariados se haya plasmado en salarios reales positivos a lo largo de todo el período. En el último cuatrienio la ganancia media real por persona y mes ha totalizado 8 puntos, alcanzando intensidades más elevadas en 1987 y 1988». Datos extraídos de, AHFPI, PSOE-CE, “32º Congreso. Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990)”, Madrid, 9-11 noviembre de 1990, sig. Fc 912, p. 23.

Queda por añadir, como la evidencia empírica ha venido a constatar, que una reducción y/o moderación de los salarios de los trabajadores no conlleva, de forma obligada ni directamente, a una mayor creación de empleos como sostiene la doctrina liberal²⁷⁴. En resumidas cuentas, los trabajadores del país terminarían asumiendo por este lado, al igual que por otros tantos, los principales sacrificios de la estrategia económica del país. Ahora bien, Miguel Boyer fue siempre de otra opinión: “La experiencia de la crisis ha sido muy dura para trabajadores y empresarios españoles”²⁷⁵.

6.2.3. La ortodoxia por bandera: el *déficit público*

El segundo objetivo de la política de ajuste del Gobierno socialista se sustentaría en la reducción del desequilibrio exterior e interno. Es decir, del *déficit público*. Aquí entraba la intervención del Estado –siempre tildado de “dirigista”²⁷⁶– en su papel desregulador, por más que la lógica y razón una vez se vieran contrarrestadas, pues como criticara José Sevilla en una,

«economía de mercado, las reestructuraciones, que, en definitiva, constituyen un proceso de acomodación de los niveles tecnológicos-organizativos a los parámetros de cosas existentes, son –o deberían ser al menos– una responsabilidad ordinaria y exclusiva del sector privado»²⁷⁷.

Se recurrió para ello a los mecanismos de intervención pública con la citada devaluación de la peseta del 8%, como una de las primeras medidas aprobadas por el nuevo Gobierno para frenar la salida de capitales –unos 500 millones de dólares diarios en aquellos momentos²⁷⁸–. Y lanzar así un mensaje tranquilizador a los mercados financieros²⁷⁹. A lo que,

²⁷⁴ Un economista lejos de toda sospecha ha mantenido como una reducción de la masa salarial, no tiene que llevar directa ni inmediatamente a la creación neta de empleos. «Por lo que se refiere a la ‘necesidad ineludible’ de una reducción de los salarios reales, prescindiendo –¡qué no es poco!– de que ello fuera políticamente posible, debe tenerse en cuenta que una caída de los niveles de vida de los trabajadores, aunque pueda frenar el proceso de sustitución de trabajo por capital y estimular con ello el empleo, tiene también efectos negativos ciertos sobre el mismo: a corto plazo, por la reducción o el crecimiento insuficiente de la demanda de consumo que puede comportar y, a largo plazo, por el menor estímulo para la modernización de la estructura productiva y el consiguiente aumento de la competitividad internacional de nuestra producción por razones distintas al precio, que es la que debe plantearse como objetivo, ya que es la que tiene efectos favorables más duraderos y la que depende menos de la inestabilidad de los tipos de cambio». FINA, Lluís, “Las propuestas de «flexibilización» de los mercados de trabajo. Promesas y realidades” en *Mercado de Trabajo...*, op.cit., pp. 55-79.

²⁷⁵ En declaraciones en, PSOE, *Hacia el cambio...*, op.cit., p. 126.

²⁷⁶ MOLINA ÁLVAREZ de CIENFUEGOS, Ignacio, “La liberalización de la economía española (por efecto de la pertenencia a la Unión Europea)” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, op.cit., p. 301.

²⁷⁷ SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política de...*, op.cit., p. 114. Asimismo como apuntó Juan Torres López: «El cambio de estrategia en lo que a intervención pública se refiere tuvo sus expresiones más concretas en cinco ámbitos: la regulación macroeconómica, el protagonismo de la política monetaria, los programas de privatización, el control del gasto público y la política redistributiva. En ninguno de ellos se ha dejado de producir la intromisión del Estado para favorecer, sin su intervención, la concurrencia e igualdad en los intercambios». TORRES LÓPEZ, Juan, *Desigualdad y crisis...*, op.cit., p. 114.

²⁷⁸ POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 345.

²⁷⁹ Véanse los argumentos ofrecidos por Miguel Boyer ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso en diciembre de 1982, recogidos ampliamente en la siguiente crónica periodística: “El partido socialista había meditado la devaluación de la peseta para cortar movimientos especulativos”, *El País*, 22 de diciembre de 1982. Aquella primera decisión supondría un *giro radical* con respecto a las posiciones económicas mantenidas hasta entonces por el PSOE y vertidas en numerosas declaraciones, publicaciones y documentos internos. Por ejemplo, el que escribiera en su día el portavoz de Asuntos Económicos del Grupo Parlamentario Socialista, junto con Santiago Roldán: «no es deseable convertir la

en breve, se sumó el inicio de una política monetaria ortodoxa –denominada por más de un autor como el “desinflacionismo competitivo”²⁸⁰ – a la par que restrictiva, que combinaría la subida de tipos de intereses, junto con la emisión de activos financieros públicos destinados a paliar el déficit público²⁸¹. El nacimiento de una inmensa deuda pública a largo plazo, que más adelante constreñiría las cuentas del Estado, se encuentra asentada en estas primeras decisiones²⁸². Téngase presente que, por aquel entonces, el déficit público del Estado rondaba el 5,6% en una situación no muy lejana de la media europea²⁸³.

Al mismo tiempo varios *dilemas* se presentaron en aquella coyuntura. En primer lugar, el estado del Bienestar apenas se encontraba desarrollado en España, y aquello era una prioridad para un gobierno de tintes socialdemócratas que necesitaba mantener el apoyo de su clientela electoral. Se planteaba así con toda su crudeza el *trade-off* entre *crecimiento* e *igualdad*. O también conocido como la “tensión clásica”²⁸⁴ entre la “alternativa entre la equidad y la eficiencia”, según el lenguaje socialdemócrata de la época²⁸⁵. Como indicó Carles Boix, “la estrategia económica estructural diseñada por el Gobierno de González dependió tanto de su credibilidad intelectual como de las ventajas puramente políticas y electorales que reportaba a políticos y votantes socialistas”²⁸⁶.

El problema del déficit público concitaría varias lecturas interpretativas en el seno del Gobierno socialista. Triunfaron otra vez las provenientes del sector hegemónico liberal-ortodoxo del Ministerio de Economía. Frente a un posible riesgo de desestabilización económica y de fuga de capitales al extranjero –a pesar de los “mimos” recibidos– la contención del gasto público aparecía como la gran cuestión a resolver. En todo caso, resultó evidente la imposibilidad técnica de compaginar una política de ajuste ortodoxo con la de incrementar las partidas sociales, hasta cuotas suficientes para cimentar un Estado del bienestar a nivel europeo. Todo lo cual conducía, tal como ha explicado Javier Astudillo, a un nuevo *dilema* todavía más problemático de resolver por los gobiernos socialistas, pues “estaba convencido de que serías restricciones económicas limitaban el alcance deseable de las políticas sociales, lo cual generaba

política monetaria en el principal instrumento de la política anti-inflacionista, puesto que ello supone, en última instancia, reducir la inflación a costa del cierre de empresas y del aumento del paro». BARÓN, Enrique y ROLDÁN, Santiago, “Crisis económica: la respuesta socialista”, *Papeles de Economía Española*, nº 2, (1980), p. 44 [*cursiva* en el texto original]. Vuelvan a revisarse lo apuntado en la *nota 156* y *nota 165*.

²⁸⁰ RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El gobierno imposible...*, *op.cit.*, p. 47.

²⁸¹ Como recordó Luis Gámir, ex-Ministro de Comercio y Turismo con la UCD y posteriormente diputado por el PP y autor además de algunas obras significativas en este tiempo, lo cierto es que esta política de rentas tendió a responder más al *paradigma liberal-neoclásico* que al propiamente *socialdemócrata-keynesiano*. GÁMIR, Luis, “Nuevos valores económicos y políticos”, *Información Comercial Española*, nº 691, (1991), pp. 109-121.

²⁸² En este sentido remitimos al claro planteamiento propuesto por, MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Sector público: ingresos, gastos y financiación” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, pp. 161-214.

²⁸³ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 346.

²⁸⁴ AHFPI, PSOE-CEF, “La política social (1983-1987)”, Madrid, abril de 1988, sig. Fc 6817, p. 108.

²⁸⁵ Véase ya el citado planteamiento teórico en, MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-equidad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, pp. 197-198. En esta línea consúltese además, FEITO HIGUERUELA, José Luis, “Competencia, mercado y equidad: un debate”, *Revista de Economía*, nº 9, (1991), pp. 7-17. Revisiones actuales sobre este *dilema* en, SÁNCHEZ de DIOS, Manuel, “El «trade-off» eficiencia-equidad y la cohesión social en Alemania, Suecia y el Reino Unido con los Gobiernos social-demócratas”, *Sistema*, nº 211, (2009), pp. 41-72.

²⁸⁶ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 161.

una cierta contradicción entre políticas económicas eficientes y políticas sociales igualitarias»²⁸⁷.

Las soluciones adoptadas en países como Gran Bretaña en la búsqueda de su “sociedad de propietarios”²⁸⁸ se van a tomar sin mayores dilaciones: un brutal ataque al estado del Bienestar de cara a reducir el déficit público²⁸⁹. Eso sí, una vez desarmado y cautivo el que antes fuera el poderoso movimiento obrero bajo la égida de Margaret Thatcher²⁹⁰. Condición esta última que en el caso español no se cumplía plenamente.

Junto a este complicado conflicto entre *eficiencia* y *equidad*, los técnicos socialistas tuvieron que hacer frente a otro no menor: generar las condiciones jurídicas, técnicas y de medios humanos para reconstruir un sistema, fiscal que tenía una de las tasas impositivas reales más bajas de los países de la OCDE²⁹¹. Y todo ello con una condición: evitar un retroceso de la demanda interna vía consumo, pues precisamente ésta se va a constituir en uno de los motores sobre los que se pensaba asentar la recuperación económica en una segunda fase.

En nuestro caso, aparecerá una propuesta intermedia entre el radicalismo neoliberal británico y el ajuste ortodoxo socialista, elaborada por Francisco Fernández Ordóñez, con la colaboración de Enrique Fuentes Quintana recuperado para una causa que el mismo había iniciado y promocionado²⁹². La solución: conseguir un incremento progresivo y gradual de la

²⁸⁷ ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, *op.cit.*, p. 509.

²⁸⁸ KLEIN, Naomi, “Desposeídos por la sociedad de propietarios”, *Rebelión*, 25 de febrero de 2008 [publicado originalmente en, *The Nation*]. Y asimismo, LAWSON, Nigel, ‘*The British Experiment*’. *The Fifth Mais Lecture*, London, City University Business School, 1984. Por último, vuelva a releerse la descripción que realizara entre 2009 y 2010 el historiador Tony Judt acerca de las consecuencias de tal *utopía*, casi tres décadas después de su puesta en marcha en la propia ciudad de Londres como uno de los más acabados ejemplos de la *sociedad de propietarios*. En concreto se centra en el caso de Stratford City al este de Londres descrito. JUDT, Tony, “El déficit democrático” en *Algo va mal...*, *op.cit.*, pp. 120-122

²⁸⁹ Libro central para seguir los ‘vaivenes’ del Estado del bienestar en, OFFE, Claus, *Contradicciones en el estado del bienestar*, Madrid, Alianza, 1990. Junto a la extensa bibliografía apuntada en el apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinarias”, véanse también los datos ofrecidos concretos para la época socialista en el apartado, “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

²⁹⁰ Sobre sus efectos directos en torno a la cuestión social, TAYLOR-GOODY, Peter, “Privatización y futuro del Estado del Bienestar británico” en RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio (comp.), *Estado, privatización y...*, *op.cit.*, pp. 129-184.

²⁹¹ Un esfuerzo que se traduciría en que durante estos años se «duplica la inversión del aparato gestor de Hacienda, se incorporan al proceso de gestión 11.000 personas, se multiplica por dos la inversión en equipos informáticos, se triplica el número de pantallas para el proceso de datos y se dobla la cifra de documentos tratados. Se introduce, en paralelo, el uso de las etiquetas, a partir de las cuales se elabora un censo en el que figuran 1.712.000 personas, cifra que supone la súbita aparición de 413.000 contribuyentes sobre los que no se tenía ni remota noticia. La recaudación pasa de 520.000 millones de pesetas en 1979 a 1,539 billones a finales de 1987». TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, pp. 244-245. Ahora bien como señalan los mismos autores lo que Carlos Solchaga nunca se planteó afrontar seriamente sería, junto a la ‘modernización del fraude’, la fuga de profesionales años más tarde: «Entre los años 1987 y 1990 un gran número de inspectores financieros y tributarios ficharon por la empresa privada o, sencillamente, pidieron la excedencia y montaron sus propios despachos de asesoría fiscal. Hasta tan punto la sangría fue grave que, en abril de 1988, seis provincias no tenían ni un solo inspector de Hacienda, entre ellas, Lleida, la tierra de José Borrell». *Ibidem*, p. 245. Para un marco de comparación, GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel y MELGUIZO ESTESO, Ángel, “Reforma tributaria y política fiscal” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, pp. 579-612. Sobre esta misma cuestión, en todo caso, se volverá con detenimiento en el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”. Véase, por lo demás, lo ya apuntado en la *nota* 260.

²⁹² El célebre economista, tras su entrada en uno de los clubs más selectos del país, los ‘padres de la transición’, una vez firmados los *Pactos de la Moncloa* no abandonaría la primera línea política tras la llegada de los socialistas. Más allá de sus obras aquí citadas, véase, primero, sobre su trayectoria

recaudación a través de los impuestos directos. Se diseñaría así una política fiscal, dentro de la ya citada estrategia global de la modernización socialista, caracterizada por,

«[i]ncrementar tanto, la presión fiscal se convirtió en una condición ‘sine que non’ para dar solidez a la estrategia socialista de reducción del déficit público, disciplina macroeconómica e intervención directa del Estado en formación de capital y crecimiento económico»²⁹³.

Visto así, aquel objetivo económico recogía, en grandes líneas, la letra del *programa electoral socialista*. Sin duda aquella política fiscal progresiva y progresista, especialmente durante la primera etapa reformista, tendría un fuerte impacto en una economía como la española en donde el fraude fiscal estaba al orden del día²⁹⁴. Así pues, será la aprobación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) la medida si bien no más importante si más simbólica de este periodo, junto con las modificaciones legislativas sobre el IRPF²⁹⁵. Ahora bien, como ha recordado Francisco Javier Braña con respecto al IVA, aquella medida se adoptó ante la obligación de cumplir la Sexta directiva de la CEE, y para ello se “consultó a las organizaciones empresariales y los sindicatos, así como [se desarrolló] la inédita campaña de información y formación [...] tratando de eliminar la resistencia a su implantación y de reducir su impacto inflacionista”²⁹⁶. Por esta vía, se produciría un parcial saneamiento de la estructura fiscal del Estado, poniéndose las bases económicas teóricas para una esperada posterior redistribución económica²⁹⁷.

También ha de remarcarse, sin ningún tipo de ambigüedad, claramente que el sistema fiscal limitó su carga de imposición sobre las tasas de beneficios del capital, en consonancia con la lógica de no dañar los *excedentes empresariales*²⁹⁸. No perjudicar dichas *ganancias*,

profesional durante la década de los setenta y ochenta los siguientes trabajos, mayormente de tono y contenido hagiográfico: COMÍN, Francisco, “Las aportaciones de Enrique Fuentes Quintana a la historia de la Hacienda Pública Española”, *Hacienda Pública Española*, nº 2, (1994) pp. 43-56; y concretamente, los trabajos contenidos en, ALBI IBÁÑEZ, Emilio (coord.), *La Hacienda Pública en la Democracia: estudios en homenaje al profesor Enrique Fuentes Quintana*, Barcelona, Ariel, 1990. Y segundo, consúltense las siguientes aportaciones: primero, su obra dirigida, FUENTES QUINTANA, Enrique [equipo dirigido], *La reforma fiscal y los problemas de la hacienda pública española*, Madrid, Civitas, 1990; y, id. y ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, *De peores hemos...*, *op.cit.* Una visión personal sobre su aportación como economista y gobernante en, FUENTES QUINTANA, Enrique, “El conflicto entre democracia y crisis económica: la respuesta de los Pactos de la Moncloa” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, *op.cit.*

²⁹³ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, pp. 162-163.

²⁹⁴ «El crecimiento de los ingresos fiscales no se debió a una mayor presión fiscal *individual*, sino fundamentalmente a la reducción del fraude: de esta forma, entre 1986 y 1987 afloraron un millón y medio de contribuyentes que no habían pagado impuestos con anterioridad». MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia...”, *op.cit.*, p. 62.

²⁹⁵ Nos remitimos aquí tanto para el desarrollo de la citada legislación como de cara a sus principales resultados al apartado específico dentro del Capítulo “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

²⁹⁶ BRAÑA PINO, Francisco Javier, “El sistema tributario español de la democracia. Principales características, evolución y algunas propuestas de reforma”, *Estudios de la Fundación I° de Mayo*, nº 19, (2010), p. 11.

²⁹⁷ Nos remitimos a lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 59*, *nota 61* y *nota 62*.

²⁹⁸ La explicación teórica sobre este fenómeno hace tiempo que la dejaron bien asentada Fernando Esteve y Rafael Muñoz. Aunque larga resulta enormemente aclaratoria: «[D]e los puntos anteriores también se sigue, a la vista del papel atribuido a los excedentes empresariales en el comportamiento de la inversión, que es necesario, aún en periodos de recuperación, continuar con una política de rentas que no ponga en peligro las expectativas sobre la evolución futura del excedente empresarial y, en consecuencia, que mantenga el comportamiento de la inversión. Esta política de rentas se instrumentaría por dos vías distintas. Por un lado, a través del intento de control de los salarios reales, control que habrá que realizarse aún en ausencia de aceleración en la tasa de inflación, mecanismo y justificación tradicional para ejercerlo. Por otro lado, la política de rentas se ejercería también por la vía presupuestaria haciendo

paradójicamente, se convertiría “en una finalidad social”²⁹⁹. Con todo, los desequilibrios fiscales no dejarían de sucederse en esta fase. En ello tuvo mucho que ver la imposición de impuestos indirectos sobre los salarios de los trabajadores, fomentándose claramente “los aspectos regresivos del sistema fiscal”³⁰⁰. Y lo que no es menor, tras una etapa fiscal que se había propuesto ordenar el panorama, el fraude y la evasión fiscal volverían a ser notas características del sistema productivo español³⁰¹.

6.2.4. El embrujo de la *retórica europeizante*

«Queremos conseguir que el nivel de vida y de bienestar de los ciudadanos de España sea equivalente al que poseen los habitantes de los principales países industrializados de la CEE [...]. No somos una nación rica, ni extraordinariamente dotada en recursos naturales por lo que pretender equiparnos progresivamente con la media de la CEE no será sencillo y nos obligará a realizar un trabajo tenaz y perseverante, a perseguir a un ritmo de alto crecimiento, a mantener elevada la tasa de inversión y a continuar modernizando el aparato productivo».

recaer en mayor medida los ingresos impositivos sobre las rentas salariales mediante la mayor participación en ellos de los impuestos indirectos y el impuesto sobre la renta, cuya progresividad se ve reducida de una forma no intencionada por la facilidad para la evasión fiscal en los tramos de rentas más elevadas así como la creencia en los efectos desincentivadores que la progresividad tiene sobre el ahorro en esos tramos superiores de renta lo que dificultaría la continuidad del proceso inversor». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, pp. 44-ss.

²⁹⁹ MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Comentarios sobre la economía española”, *Leviatán*, nº 32, (1988), p. 48.

³⁰⁰ ALBURQUERQUE, Francisco, “Una crítica al...”, *op.cit.*, p. 139.

³⁰¹ Los datos recogidos por Juan Torres López, junto con otros economistas, para los primeros años noventa son evidentes de la pasividad gubernamental del Gobierno frente al fraude fiscal: «[L]os tribunales tan sólo dictaron 18 sentencias en 1990 (15 condenatorias), 28 en 1991 (21 condenatorias) y 32 en 1992 (20 condenatorias), y esto aparte de haber elevado sustancialmente la cuantía defraudada para que se considere delito fiscal». TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 47 [véase por lo demás, de nuevo, el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”]. Para un mayor abundamiento consúltese, COMÍN, Francisco y ZAFRA, Juan (eds.), *El fraude fiscal...*, *op.cit.*. Y dentro de ese dossier monográfico los textos de, COMÍN, Francisco, “El fraude fiscal en la Historia: un planteamiento de sus fases” (pp. 31-46); y, DÍAZ FUENTES, Daniel, “Fraude y amnistías fiscales en la España contemporánea, 1940-1990” (pp. 389-402). Unos años antes *Papeles de Economía Española* publicaría un número monográfico –nº 30-31, (1987)– sobre el mismo asunto y que contenía entre otros trabajos los siguientes: BORRELL, José, “Balance del sistema tributario” (pp. 56-63); GARCÍA LÓPEZ, José y ALVIRA MARTÍN, Francisco Ricardo, “Los españoles y la fiscalidad: la pérdida de la ilusión financiera” (pp. 90-107); o, el de, RAYMOND, José Luis, “Tipos impositivos y evasión fiscal en España: un análisis empírico” (pp. 154-169). Por lo demás, véanse, GINER de GRADO, Carlos, “El fraude fiscal en España”, *Documentación Social*, nº 76, (1989), pp. 137-154. Consúltese asimismo el informe de la Comisión del Fraude Fiscal en, LAGARES CALVO, M. (dir.), *Evaluación del fraude en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ejercicios 1979 a 1987. Tablas estadísticas*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1988. A nivel jurídico, GAMAZO, Juan Carlos (ed.), *Economía de la evasión fiscal: judicialización de los incumplimientos tributarios*, Valladolid, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1994. Y, finalmente, un estado de la cuestión para estos años en, GAMAZO, Juan Carlos, “Principales trabajos empíricos en materia de evasión fiscal”, *Anales de Estudios Económicos y Empresariales*, nº 9, (1994), pp. 199-218. Véase además en este trabajo los datos que se ofrecen en los respectivos cuadros estadísticos acerca del extendido fraude fiscal durante la década de los ochenta.

PSOE, *Ponencia marco al 31 Congreso*³⁰².

El tercer objetivo de las políticas de ajuste giraría en torno al proceso de liberalización de la economía española como ya se ha hecho constar. La búsqueda de los esperados equilibrios macroeconómicos pasaba, de cualquiera de las formas, por atraer inversiones y abrir a España al mercado internacional. Un *mandamiento liberal* de especial importancia por más que a través de esta opción plenamente liberalizadora –como señalaría Francisco Alburquerque– “puede advertirse un antagonismo entre un tipo de crecimiento «asociado» a los intereses y objetivos del capital transnacional, y la defensa de «la autonomía e independencia nacionales», en el proceso de crecimiento económico”³⁰³.

Para tal proyecto no faltarían adeptos, seguidores ni medios cuando no justificaciones de todo tipo, ante lo que se consideró “imprescindible” o de “absoluta necesidad [...] [para] llevar a cabo un ajuste económico”³⁰⁴. Al reto estrictamente económico se añadía en el horizonte más cercano otro político-económico: cumplir los duros requisitos que imponía el Tratado de Adhesión a la CEE³⁰⁵.

Casi al compás del inicio de la estrategia de la modernización, en breve, volvieron a sonar aquello de las *medidas duras, muy duras*, ahora con acento europeo. La *consigna* de “ganar el desafío europeo” se iría instalando poco a poco³⁰⁶. En suma estamos ante lo que Antonio Elorza denominaría como “el socialismo de «lo posible» [...], el socialismo de la dependencia”³⁰⁷.

³⁰² AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 31 Congreso del PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid 2 y 3 de octubre]”, Madrid, PSOE, 1988, Fc 652, p. 39.

³⁰³ ALBURQUERQUE, Francisco, “Una crítica al...”, *op.cit.*, p. 134. Tesis también defendida por, ELORZA, Antonio, “Las raíces del «fenómeno socialista»” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*

³⁰⁴ MOLINA ÁLVAREZ de CIENFUEGOS, Ignacio, “La liberalización de la economía española (por efecto de la pertenencia a la Unión Europea)” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, *op.cit.*, p. 300. De hecho, el ‘mal endémico’ del proteccionismo ha sido considerado como uno de los principales lastres para nuestra definitiva modernización. Un ejemplo expuesto por el mismo autor será más que suficiente: «Históricamente, España no ha pertenecido al grupo de países capitalistas con mayor tradición liberal y, de hecho, su orden burgués ha convivido siempre con abundantes distorsiones a la competencia en forma de elevados aranceles, concesiones en exclusiva de la comercialización de ciertos factores de crecimiento y otras restricciones». *Ibídem*, p. 298. Véase también las aportaciones, desde otro ángulo, de, MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael y BONETE, Rafael, *Introducción a la Unión Europea. Un análisis desde la economía*, Madrid, Alianza, 1997.

³⁰⁵ Sobre este importantísimo acontecimiento en la historia del país y su creciente normalización internacional, con sus condiciones e imposiciones a la hora de su firma, consúltese entre centenares de trabajos los cuatro siguientes: en primer lugar, no pocos trabajos contenidos en el volumen colectivo de, MORENO JUSTE, Antonio (ed.), *España y el proceso de construcción europea*, Barcelona, Ariel, 1998; así como MORATA, Francesc, *La Unión Europea. Procesos, políticas, actores*, Barcelona, Ariel, 1998; BADOSA, Juan, “La adhesión de España a la CEE”, *Información Comercial Española*, n° 826, (2005), pp. 99-106; y concretamente, ÁLVAREZ MIRANDA, Berta, *El sur de Europa y la adhesión a la Comunidad. Los debates políticos*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1996. Toda la documentación relativa al citado tratado en, [//eur.lex.europea.eu/es/treaties/dat1985I/tif/JOL/1985_302_01_ES_0005.pdf](http://eur.lex.europea.eu/es/treaties/dat1985I/tif/JOL/1985_302_01_ES_0005.pdf). Por último, para una lectura partidista al respecto, véase, YÁÑEZ BARNUEVO, Juan Antonio y VIÑAS, Ángel, “Diez años de política exterior del gobierno socialista (1982-1992)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, pp. 85-133.

³⁰⁶ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 27.

³⁰⁷ ELORZA, Antonio, “Las raíces del «fenómeno socialista»” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 67. Una estrategia que para el mismo autor haría acreedor al socialismo español de la «calificación de ‘socialismo liberal’». *Ibídem*.

Aquello coincidiría en el tiempo con la primera fase de reestructuración económica, en donde las políticas económicas socialistas tendrían que superar no pocas etapas previas. Por un lado, las condiciones y demás imperativos legales que demandaba la entrada en la futura Unión Europea. Imperativos que navegan en su mayoría en la dirección que había tomado la política económica socialista. Por otra parte, el Gobierno –partiendo de una coyuntura electoral y social favorable– pudo contar para este *nuevo reto* de su proyecto modernizador, con prácticamente todas las condiciones estructurales y sociales necesarias³⁰⁸. La sola idea de integrarse en Europa, se constituyó un revulsivo que poca duda o resistencia podía encontrar entre la opinión pública en general. He aquí otra *idea-fuerza* que calaría entre las fuerzas socialistas, tanto en el Partido como en el Sindicato. No podía oponérsele argumento u oposición alguna, pues la meta de converger con Europa era tan previsible, tan futurible, tan palpable, que la *utopía* tantas veces soñadas se acercaba al cumplimiento de una realidad material³⁰⁹. Ahora bien, cuando existió algún tipo de crítica más o menos soterrada, pronto llegaron las inevitables críticas, acusaciones y culpabilizaciones de sus promotores³¹⁰. Como señaló el propio Fernando Esteve Mora:

«Si se recuerdan aquellos años de las recientes décadas pasadas, parece que fueron tanto el consenso político-económico de los tiempos de la transición a la democracia como algunas otras razones, de esas llamadas ‘Estado’, los que hurtaron la cuestión de la integración de la economía española en la CEE a una discusión pormenorizada en el ágora pública de modo que fueron pocos los que, aun sin negarse claramente y aceptando lo inevitable, se atrevieron siquiera a pensar críticamente aquel asunto. En su descalificación se utilizaron variopintos y a veces degradantes epítetos que iban desde al adjetivo de ‘ultra’ (ya fuera de izquierdas o de derechas) hasta el de simplemente ‘tonto’, a tenor de las ‘obvias’ ventajas que en el ‘futuro’ se iba a derivar para la economía española por la fuerza de los ‘hechos’»³¹¹.

³⁰⁸ En las tres publicaciones periódicas centrales del entorno del socialismo español *Sistema*, *Zona Abierta* y *Leviatán* –junto con *El Socialista*– se publicarían numerosos artículos por parte de destacados y conocidos dirigentes socialistas, con Felipe González a la cabeza, en donde se proclamaría su profunda *fe europeísta*. Más concretamente remitimos a, GUERRA, Alfonso [et al.], *El nuevo compromiso europeo. Jávea III* [3º Encuentro sobre el Futuro del Socialismo, Jávea, Septiembre, 1987], Madrid, Sistema, 1987, así como al documento, PSOE, *España ante el reto de Europa*, Madrid, PSOE, 1985.

³⁰⁹ Un ejemplo entre múltiples que se pueden tomar prestados lo proporciona una vez más la propia UGT: «La U.G.T. siempre ha apoyado junto con la globalidad de las fuerzas sociales de España la entrada en la C.E.E. [...]. La plena equiparación se obtendrá, absolutamente a todos los efectos y para todos los trabajadores españoles, en el peor de los casos al cabo de siete años». AHFFLC, UGT, Gabinete Técnico Confederal, “Integración en la C.E.E. desde el punto de vista de integración social”, Madrid, 1985?, sig. 001620-003, p. 1. Eso sí, tan sólo tres años después las opiniones por parte de la central sindical socialista habían dado un vuelco sobresaliente, criticando duramente como la integración en Europa debía ser «algo más que un proyecto capitalista y una zona de libre cambio –que aumenta las desigualdades entre los países y las regiones y amenace las conquistas sociales–». AHFFLC, UGT-CC, “Prioridades del Espacio Social Europeo. Resolución aprobada por el Comité Confederal de la Unión General de Trabajadores”, Madrid, 4 y 5 de noviembre de 1988, sig. AI-174-03. Por su parte, el PSOE en sus diferentes procesos congresuales a lo largo de estos años se mostraría siempre más comedido. Así por ejemplo en su XXXI Congreso en enero de 1988 declararían como entre sus objetivos básicos estaba: «Alcanzar en diez años a las naciones europeas avanzadas. En el plano económico nos proponemos que durante los años que restan de siglo nuestro país alcance los niveles de desarrollo de las naciones europeas más avanzadas». AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 9.

³¹⁰ Un relato enormemente rico en detalles de todo este proceso en, TORLOSA, José Mª, *El «cambio» y la Modernización: OTAN, CEE y nuevas tecnologías*, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil Albert, 1985.

³¹¹ ESTEVE MORA, Fernando, “«Atracción fatal». Una contribución al debate sobre la integración de la economía española en la Unidad Económica y Monetaria Europea” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, op.cit., p. 83. En esta misma línea, RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, “Posibilidades y límites de la idea de una Europa social”, *Revista Internacional de Filosofía Política*, nº 5, (1995), pp. 21-37, dentro de un dossier monográfico dedicado a, *El futuro de Europa*. Consúltase asimismo sobre el amplio sentir europeísta en España, MORAL, Félix (redacción), *La opinión pública*

Un singular del proceso de adaptación europea en España que distó de lo que sucedió en no pocos países europeos –Alemania, Italia, Francia...– donde se originaron fuertes conflictos políticos y sociales ante la adopción de medidas similares.

Así la asociación entre Europa y la culminación de la primera etapa de la modernización, se fusionaron como dos ideas-fuerzas simbióticas que reforzarían, a su vez, la lógica de la “única política posible”³¹². Sumado al más que constatable *entusiasmo* del Gobierno, dispuesto a aceptar todas las condiciones necesarias sin la menor crítica u oposición alguna, el trayecto europeizador daría comienzo. Lo que, al mismo tiempo, daría lugar a lo que se ha denominado como la “aceptación pasiva de la adhesión” una vez negociadas una “pobres condiciones” para el acceso al club europeo³¹³.

Un ejemplo, puede resultar del todo clarificador. Tras asistir al funeral del presidente de la URSS, Konstantín Chernenko quien fallecería el 10 de marzo de 1985, a escasos tres meses de la firma del tratado para la adhesión a la CEE y paralizadas, en la práctica, todas las negociaciones; Felipe González tendría una fructífera conversación con la propia Margaret Thatcher. Esta última le daría un pequeño-gran consenso: “Haga usted lo mismo que yo: entre, después siga negociando lo que no le han impuesto. Tenga en cuenta que aquí hay dos negociaciones, la que se hace desde fuera y la que se hace desde dentro”. Dicho y hecho, a continuación González llamaría a Manuel Marín –jefe del equipo de negociación– y le “pidió [...] que aceptase lo que le ofrecían y que cerrase el trato, aunque fuera perdiendo”³¹⁴.

En todo caso, en este proceso *ideológico* y de *praxis* económica, si la modernización se constituiría en un objetivo innegociable en donde los medios justificaban el fin, con Europa –incluida dentro del esquema de la modernización socialista, en el que ocupaba un lugar privilegiado– se repetirían análisis y recetas. En la práctica la futura integración en la CEE, al igual que ocurrió con el referéndum de la OTAN, crearía un eficaz vínculo psicológico entre *modernización* y *europeización*, para lo que además se contaría con una ciudadanía, según las

española ante Europa y los europeos, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1989; SZMOLKA VIDA, Inmaculada, *Veinte años de pertenencia a la Unión Europea: actitudes de los españoles ante el proceso de integración comunitaria*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007. Asimismo entre otros estudios, DÍEZ MEDRANO, Juan, *La opinión pública española y la integración europea: 1994, resultados del estudio 2084*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995; BARREIRO, Belén y SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio, “La europeización de la opinión pública española” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, *op.cit.*, pp. 27-51.

³¹² Como ha destacado Carles Boix entre los más interesados estaban las propias élites económicas, que veían la entrada en la CEE como un gran mercado por explorar y explotar: «González had strong political and economic incentives to adhere wholeheartedly to the European project. Joining the European Community enjoyed overwhelming public support, mostly derived from a general belief linking the integration into Europe to the culmination of the modernization process of the country. Moreover, the political and business elites strongly agreed that entry to the European Community would yield strong benefits to the Spanish economy –a vast market and a place to look for readily available capital». BOIX, Carles, “Building a socialdemocratic...”, *op.cit.*, p. 8.

³¹³ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 52. Una *adaptación pasiva* que con anterioridad había sido, en gran medida, la orientación de la política económica de los gobiernos de la UCD como tanto criticara, SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política de...*, *op.cit.*. Asimismo, primero, consúltese, GONZÁLEZ-SÁNCHEZ, Enrique, “Las negociaciones de adhesión de España y las Comunidades Europeas desde abril de 1984 hasta su conclusión”, *Revista de Instituciones Europeas*, vol. XII, nº 2, (1985), pp. 439-464. Y en segundo lugar en lengua anglosajona, ANDERSEN, Svein S. y ELIASSEN, Kjell A. (eds.), *Making policy in Europe: complex policy-making*, London, Sage Publications, 1993; MARKS, Peter, *The Making of Spanish European Policy*, London, Gower, 1994; y, MÉNY, Yves, MULLER, Pierre y QUERMONNE, Jean-Louis (eds.), *Adjusting to Europe. The impact of the European Union on national institutions and policies*, London, Macmillan, 1996.

³¹⁴ GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, *op.cit.*, pp. 270-271.

encuestas y diversos estudios del momento, volcada en tal tarea³¹⁵. Aquí, nuevamente, el *consenso académico liberal* sería absoluto³¹⁶. Todo ello con el añadido de superar la extendida idea del endémico retraso con respecto a Europa³¹⁷. El propio José María Maravall lo definiría de forma más exacta:

«La adhesión a la Comunidad Europea tenía un ingente valor simbólico: la sociedad española relacionaba el largo aislamiento con las dificultades de la democracia y asociaba la vinculación a la Comunidad Europea con la restauración de la democracia y con la idea de la ‘modernización’»³¹⁸.

Un valor simbólico que se expresó iconográficamente con la propia firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal un miércoles 12 de junio de 1985 y que, en buena medida, abría otra nueva etapa en la historia del país. Todo quedaría resumido en la “ilusión por Europa” de la que tanto hablara el propio presidente de Gobierno en aquellos años³¹⁹.

³¹⁵ Al respecto Enrique Alberola ha sido contundente: «La política macroeconómica ha estado subordinada al proceso global de europeización. Es difícil concebir, a posteriori, que la consolidación del nuevo Estado democrático pueda haberse verificado al margen del proceso de europeización. La trascendencia concedida a la integración económica y social en Europa explica el carácter instrumental de la política macroeconómica para conseguir estos objetivos». ALBEROLA ILA, Enrique, “La europeización de la política macroeconómica” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del..., op.cit.*, p. 349.

³¹⁶ «Además, las élites política y económica coincidieron en resaltar las importantes ventajas económicas que la entrada en la Comunidad Europea reportaría a la economía española: un vasto mercado y una fuente inagotable de capital inversor [...]. El proyecto de integración europea reforzó necesariamente a lo largo del tiempo una política económica preocupada por mejorar el nivel de competitividad nacional mediante el logro de una baja tasa de inflación». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 179. Una visión un tanto idílica que contrasta con la ofrecida en su día por James Petras: «Todo un ejército de intelectuales ex-izquierdistas se ha encargado de elaborar la mistificación ideológica de este proceso de regresión social. Su tarea ha consistido en vender los programas de pro-inversión y antiobreros de los socialistas como el único programa realista ‘posible’ en España, dado su sistema constitucional, la necesidad de integrarse en Europa, su naturaleza subdesarrollada, la amenaza del golpe militar, el problema de la modernización del país, etc.». PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español..., op.cit.*, p. 28.

³¹⁷ Sin embargo, si se profundiza en el asunto de la siempre repetida ‘anormalidad’ resulta que como destacaron José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez, que «la trayectoria económica de España a lo largo de los dos últimos siglos responde, sin duda, a un patrón general de crecimiento plenamente europeo, compartido, en sus grandes tendencias [...]. De modo que, contrariamente a lo que a veces se ha pretendido, la evolución a largo plazo de la economía española dista de resultar anómala o atípica cuando se contempla dentro de la senda común de la industrialización europea». GARCÍA DELGADO, José Luis y JIMÉNEZ, Juan Carlos, “El proceso de modernización económica: perspectiva histórica y comparada” en id. (dir.), *España, economía..., op.cit.*, p. 2.

³¹⁸ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia..., *op.cit.*, p. 55.

³¹⁹ GONZÁLEZ, Felipe, “La cohesión y la solidaridad en la construcción europea”, *Sistema*, nº 86-87, (1988), pp. 11. El texto es una intervención no leída en un acto en el Consejo Federal del Movimiento Europeo a finales de 1988. Entre las cuestiones allí contenidas sobresalen los aspectos económicos y, por tanto, los retos de la propia integración económica. La tesis de la modernización, según esta misma lectura, se veía nuevamente reconfirmada: «Desde mi punto de vista, la cohesión económico-social es ese hilo conductor que permitirá avanzar coherentemente hacia el objetivo unitario europeo. No marco plazos, simplemente digo que es el hilo conductor que tiene que impregnar todas las políticas que se desarrollan en la Comunidad en su avance hacia la construcción europea. Por el momento, hacia el cumplimiento de lo que se consideran los objetivos del Acta Única» *Ibidem*. Dicho esto, se entiende aquí por *liberalización económica* —en la línea con lo aplicado por los gobiernos socialistas— la definición proporcionada por Ignacio Molina: «El concepto de liberalización económica [...] designa el fenómeno por el que los poderes públicos se replantean el papel a desempeñar, de forma directa o través de la regulación, en la producción de bienes y en la prestación de servicios profesionales. Es un proceso sumamente complejo que podría caracterizarse de forma muy general como el convencimiento creciente, por parte del Estado, de que ha de abandonar el proteccionismo y las distorsiones en el mercado para

Sin poder ni querer entrar en un debate en profundidad, la europeización del sistema político español, siguiendo la propuesta formulada por Carlos Closa, debe interpretarse de la siguiente forma: “un proceso [...] que reorienta la forma de la política doméstica en la medida que las dinámicas políticas y económicas de la UE se convierten en parte de la lógica organizacional de la política y las políticas públicas nacionales”³²⁰. De hecho, el Tratado de Adhesión de 1985 estableció un conjunto de oportunidades pero también de exigencias³²¹. Si con la integración en Europa se abría para España un nuevo periodo histórico y económico en donde se alcanzaría un “modelo de economía abierta”, aquello obedecía a la aceptación de cuatro principios rectores de la economía sintetizados por Enrique Fuentes Quintana en:

«la plena apertura frente al exterior de los intercambios de bienes, servicios y capitales; ganar las bases firmes de una estabilidad interna de precios y del tipo de cambio de la peseta con la aplicación de una política económica de estabilización que asegurara el logro de esos objetivos; la difícil aplicación de una política presupuestaria que, al tiempo que modernizaba las instituciones de nuestra hacienda pública, lograra dominar el crecimiento excesivo del gasto público y prevenir los grandes peligros de un déficit público estructural y el crecimiento continuado de la deuda pública; la liberalización y la implantación de la competencia en nuestros mercados de bienes, servicios y capitales, en definitiva una extensión interna obligada del principio básico de la apertura exterior»³²².

Entre las reformas más importantes, en esta misma dirección, se pueden destacar las siguientes. Primero, reforma y saneamiento del sistema bancario y financiero español con la renuncia explícita a construir una banca pública, más allá de la corta como frustrada experiencia de Argentaria³²³. A saber, lo que posteriormente se ha denominado, no sin cierta ironía, como la “reconversión silenciosa”³²⁴. Los socialistas no iban a titubear en dicha materia a pesar de que cómo se ha insistido repetidamente “la crisis bancaria fue provocada, en buena parte, por la propia banca” a través de un “delirio especulativo”³²⁵.

impulsar precisamente una política económica opuesta en la que los mecanismos de oferta y la demanda privada conformen cada vez más la asignación de los recursos». MOLINA, Ignacio, “La liberalización de la economía española (por efecto de la pertenencia a la Unión Europea)” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, op.cit., p. 293.

³²⁰ CLOSA, Carlos, “La europeización del sistema político español” en id. (ed.), *La europeización del...*, op.cit., p. 501.

³²¹ Véase lo apuntado en la *nota* 305.

³²² FUENTES QUINTANA, Enrique, “La economía como profesión: Una memoria personal” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., p. 748.

³²³ Sus bases centrales quedan ampliamente reflejadas para una primera etapa en, REQUEIJO, Jaime, “Crisis económica y reforma del sistema financiero”, *Información Comercial Española*, nº 617-618, (1985), pp. 145-160, dentro del dossier monográfico titulado, *Diez años de política económica española (1974-1984)*.

³²⁴ MARÍN ARCE, José M^a, “Los socialistas en...”, op.cit., p. 56. Sobre la corta ‘vida’ de la banca pública Argentaria (1991-1993/1999) apenas existen estudios. Entre otros escasas referencias parciales cuando no interesadas: PLAZA HIDALGO, Isabel y MELLE HERNÁNDEZ, Mónica, “La relación entre la estructura organizativa, estrategia y resultados en el Grupo Argentaria”, *Papeles de Economía Española*, nº 58, (1994), pp. 276-283. Por lo demás, un interesante recorrido sobre por estas cuestiones en, LIEBERMAN, Sima, *Growth and Crisis in the Spanish Economy, 1940-93*, London, Routledge, 1995, pp. 276-ss. Todo ello junto con los trabajos de, CUERVO, Álvaro, *La crisis bancaria en España, 1977-1985: causas, sistema de tratamiento y coste*, Barcelona, Ariel, 1988; y, MARTÍNEZ MÉNDEZ, Pedro, *Los beneficios de la Banca, 1970-1989*, Madrid, Banco de España, 1991. Así mismo consúltese el capítulo del libro de, CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, op.cit., titulado, “La transición bancaria” (pp. 358-394) en donde se ofrece un detallado cuadro de las relaciones e interrelaciones entre Gobierno y banqueros. Por último, desde el ámbito periodístico, GONZÁLEZ URBANEJA, Fernando, *Banca y poder...*, op.cit.. Véase, por lo demás, lo apuntado en la *nota* 329.

³²⁵ FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista

La conocida como la “expropiación del miedo”³²⁶ de Rumasa y su posterior reprivatización fue su más evidente signo. Decisión que llegaría a costar a las arcas públicas 440.000 millones de pesetas, según los datos manejados por los propios socialistas³²⁷. José M^a Marín Arce con buen criterio afirmaría: “El asunto Rumasa no fue, por lo tanto, un acto de fuerza ni de amenaza contra la derecha, ni contra los empresarios”³²⁸.

Y al mismo tiempo se mostraría que la política de nacionalizaciones –tan temida por las clases dominantes por más que los socialistas no dejarán de insistir en que no iban a practicar dicha política³²⁹– quedaría en la práctica limitada a la red electrónica de alta tensión y circunstancialmente a la Banca Catalana –crisis que dejaría otro agujero de cerca de 130.000

(1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, pp. 49 y 50, respectivamente. Señalaban los propios autores: «El resultado de todo ese delirio especulativo –del que en gran parte el entonces presidente de la AEB, Rafael Termes, responsabiliza a los banqueros advenedizos que surgieron al amparo de la reforma de 1962– fue que, entre 1975 y 1984, la crisis bancaria afectó a más de la mitad de los bancos existentes –58 de los 100 que había en 1977– y aproximadamente a una quinta parte del total de sus recursos (propios y ajenos) y eso a pesar de que no todas las situaciones críticas han trascendido a la opinión pública». *Ibidem*, p. 50. Complétense las anteriores aportaciones con, MARTÍNEZ DE PABLO, Francisco J., “La banca, de los setenta al mercado único” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, pp. 349-370. Todavía más grave resultaría incluso que en el verano de 1983 se conociera que el Banco de España conocía la grave situación de las entidades financieras desde, al menos, 1978, según declararía sin ningún tipo de tapujo el propio Gobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles en un curso del verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en un julio de 1983. Según se informaba en aquella noticia: «Lo que no queda claro después de la intervención del gobernador del Banco de España es cómo, teniendo plena convicción de que determinadas entidades iban a entrar en crisis, se les permitió continuar con prácticas expansivas, compra de bancos en dificultades e incluso reparto de dividendos en ejercicios muy próximos a su declaración de crisis. La política seguida, tanto por los representantes oficiales como de la banca privada, fue, en primer momento, negar la existencia de cualquier crisis para, posteriormente, y una vez que ya existían controles externos, dar a conocer el volumen de desequilibrio patrimonial, que suele alcanzar varios miles de millones de pesetas». Presentando, por último, los siguientes datos: «La crisis bancaria de los últimos cinco años ha alcanzado a 51 bancos de los 108 existentes, lo que representa el 18% de depósitos en poder de la banca y casi el 22% de los recursos propios». Noticia, Salvador Arancibia, “El Banco de España conocía el alcance de la crisis bancaria desde 1978”, *El País*, 5 de julio de 1983.

³²⁶ EKAIZER, Ernesto, “La expropiación del miedo” en JULIÁ, Santos, PADRERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la...*, *op.cit.*, pp. 377-383.

³²⁷ AHFPI, PSOE, Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, “La política económica de los socialistas: balance de un ajuste solidario”, Madrid, 1986, sig. B 3482, p. 36. Cifras oficiales que contrastan con otras muchas dadas. Por ejemplo la de 800.000 millones de pesetas ofrecida por, RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “De la agonía a la agonía” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, *op.cit.*, 55.

³²⁸ MARÍN ARCE, José M^a, “Los socialistas en...”, *op.cit.*, p. 45.

³²⁹ Muy significativos en esta línea fueron los numerosos artículos aparecidos en la prensa del Partido mediados de abril a los primeros diez días de mayo de 1982, en plenas elecciones andaluzas. A modo de ejemplo: ALMUNIA, Joaquín, “Empresa pública, sí: nacionalizaciones, no”, *El Socialista*, n° 253, (1982); BOYER, Miguel, “Las nacionalizaciones de mito social a instrumento a considerar”, n° 254, (1982); SOLCHAGA, Carlos, “Sobre las nacionalizaciones y el PSOE”, *El Socialista*, n° 256, (1982). Por ejemplo, este último terminaría afirmando –en muy similar línea con lo expresado unos meses antes por el propio Boyer quien se presentaba como un simple afiliado de la Agrupación de Chamartín y quien además pertenecía al Grupo de Economistas del PSOE– lo siguiente: «La revisión profunda de estos temas en la perspectiva del impresionante desarrollo tecnológico que estamos viviendo, y que ha de transformar radicalmente las relaciones de producción en los próximos decenios, constituye, en mi opinión, el tema de nuestro tiempo y no, desde luego, el de las nacionalizaciones. Esta ingenuidad de declarar los nuevos problemas a resolver sin tener respuestas para los mismos o la hipocresía de aceptar el cuerpo de la doctrina como plenamente relevante en este momento histórico sin sacar de ello las conclusiones pertinentes, yo mi inclino por la ingenuidad. Entre la esquizofrenia hoy existente entre la mayor parte del movimiento socialista [en clara alusión al caso del socialismo francés], entre la teoría y la praxis o la revisión de aquella, yo me declaro por el revisionismo».

millones de pesetas y en donde estaría implicado Jordi Puyol y otros “prestigiosos” empresarios catalanes³³⁰⁻³³¹. José M^a Marín Arce con buen criterio afirmaría: “El asunto Rumasa no fue, por lo tanto, un acto de fuerza ni de amenaza contra la derecha, ni contra los empresarios”³³².

El coste de aquellas políticas sería enorme. El 18 de octubre de 1985 se conocía un informe realizado por el Tribunal de Cuentas, en donde se explicaba como la propia crisis financiera –que se llevaría por delante a más de medio centenar de entidades– había costado al erario público 1,2 billones de pesetas de los que 500.000 millones de pesetas correspondían al *caso Rumasa*³³³. Y ello a fondo perdido como en otras tantas materias, aunque eso sí con la siempre buscada *bendición* de «el Club de los Siete»³³⁴.

³³⁰ Este particular caso que ha quedado en un plano secundario ante las dimensiones del ‘caso Rumasa’, véase, BARATECH, Feliciano, *Banca Catalana (1959-1984). Toda la verdad*, Barcelona, Planeta, 1985; así como el trabajo de los periodistas, BAIGES, Francesc, GONZÁLEZ, Enric y REIXACH, Jaume, *Banca catalana más que un banco, más que una crisis*, Barcelona, Plaza & Janés, 1985; y, asimismo, GUINDAL, Mariano, “Los cien mil millones de Banca Catalana” en *El secreto de...*, *op.cit.*, pp. 230-232. Por lo demás, el relato de uno de los implicados, CABANA, Francesc, *Banca Catalana, diari personal*, Barcelona, Tibidabo, 1989. En cualquier caso, otros tantos datos se manejarían durante aquellos años. Por ejemplo el periodista económico de *El País* calculaba, a grandes rasgos, que Banca Catalana tenía un agujero de 139.000 millones de pesetas y que se necesitarían 291.000 para salvarlo. No eran datos gratuitos, sino datos por el propio Miguel Boyer el 16 de junio de 1983 en una sesión parlamentaria. Estos y otros tantos datos pueden verse en, VIDAL-FOLCH, Xavier, “Banca Catalana, el coste de una crisis”, *El País*, 3 de junio de 1984.

³³¹ Sobre los movimientos previos y posteriores al decreto de expropiación, DÍAZ GONZÁLEZ, Enrique, *Rumasa...*, *op.cit.*. Sobre la jurisprudencia que ocasionó tal decisión: CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, “Crónica de jurisprudencia sobre la valoración expropiatoria de acciones y participaciones representativas del capital de empresas del grupo Rumasa”, *Revista General de Derecho Administrativo*, nº 1, (2002). Consúltese, por último, el ilustrativo, Real Decreto-Ley 2/1983, de 23 de febrero, *de expropiación, por razones de utilidad pública e interés social, de los bancos y otras sociedades que componen el Grupo “Rumasa, S.A.”* [B.O.E. 24 de febrero de 1983]. En todo caso, desde aquel momento no se ha dejado de cuestionar la ‘idoneidad’ de tal medida: «Aunque nunca se sabrá con certeza, si el gobierno hubiese permitido que actuasen libremente las fuerzas del mercado en vez de acudir a la expropiación, es posible que una buena parte de Rumasa hubiese sido capaz de superar la crisis económica y de beneficiarse de la recuperación iniciada en 1985». POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 351.

³³² MARÍN ARCE, José M^a, “Los socialistas en...”, *op.cit.*, p. 45.

³³³ Noticia, “La crisis bancaria ha costado 1,2 billones”, *El País*, 19 de octubre de 1985. Sobre esta etapa y las diversas cifras que se han dado sobre el coste de esta operación, y que algunos autores elevan a dos billones de pesetas, véase de nuevo, CUERVO GARCÍA, Álvaro, *La crisis bancaria...*, *op.cit.*. Este último documentado trabajo señalaba como solamente a la altura de 1985, la crisis bancaria había costado más de 1,58 billones de pesetas, siendo asumidos a fondo perdido por el Estado más de tres cuartas partes. Consúltese, primero, GUINDAL, Mariano, “23-F económico” en *El Declive de...*, *op.cit.*, pp. 220-ss. Y, por lo demás, PÉREZ, Francisco, MAUDOS, Joaquín y PASTOR, José Manuel, *Sector bancario español (1985-1997): cambio estructural y competencia*, Alicante, Cajas de Ahorros del Mediterráneo, 1990. Para los entresijos menos conocidos, DÍAZ HERRERA, José y TIJERAS, Ramón, *El dinero del...*, *op.cit.*, y en concreto el capítulo XXIV, “Los grandes negocios de la banca con el PSOE”. Por último revítese el excelente trabajo de TORTELLA, Gabriel, “La transición bancaria” en JULIÁ, Santos, PADRERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la...*, *op.cit.*, pp. 569-574.

³³⁴ Sobre las relaciones entre el PSOE y los principales banqueros, junto al conocido trabajo de, RIVASES, Jesús, *Los banqueros del PSOE*, Barcelona, Ediciones B, 1988, véase el examen periodístico de, GONZÁLEZ URBANEJA, Fernando, *Banca y poder...*, *op.cit.*. Por lo demás, no deje de leerse las más que interesantes aportaciones de muchos de los implicados en este campo en, GARCÍA ATANCE, Salvador [et al.], *Historias de una década. Sistema financiero y economía española, 1984-1994*, Madrid, AB Asesores, 1995. Y asimismo, TERMES, Rafael, *Desde la banca. Tres décadas de vida económica española*, II vols., Madrid, Rialp, 1991. Sobre su papel de director del siempre poderoso sector financiero español y su capacidad de influencia para *torcer* cuando no *comprar* voluntades políticas, véase, lo que sucedería en una reunión entre Termes y otros grandes banqueros y el propio Felipe González –

En segundo lugar, debe citarse la crucial *reforma del sector energético* (Plan Energético Nacional) que conllevaría una reordenación prácticamente total de este importante sector³³⁵. Tercero, la *reforma de las empresas públicas* con la reestructuración del INI a la cabeza y la *reconversión industrial* incluida³³⁶. Más allá de sus costes económicos y laborales de los que se hablará más adelante³³⁷, el Gobierno tampoco ocultó sus preferencias en la que ha sido calificada como la parte más dura de “la política económica del periodo reformista del Gobierno del PSOE”³³⁸.

acompañado de Miguel Boyer— un 5 de junio de 1984. Una cena en la Moncloa que modificaría radicalmente el segundo proyecto de reforma fiscal de los socialistas. Sobre la misma y sus resultados, nos remitimos a, “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”.

³³⁵ Primero consúltese, *Plan Energético Nacional*, documento presentado en el Congreso de los Diputados en el primer semestre de 1984 en el contexto de la puesta en marcha del *Programa Económico a Medio Plazo* [véanse las múltiples intervenciones en, www.congreso.es en II Legislatura, meses de febrero a mayo de 1984]. Sobre su no fácil tramitación junto con sus contenidos centrales, DELGADO-IRIBARREN, Manuel, “El Plan Energético Nacional (P.E.N.) 1983”, *Revista de Administración Pública*, n° 104, (1984), pp. 449-462. Asimismo resulta de relevancia los datos ofrecidos por el, MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, *Plan Energético Nacional: 1978-1987*, Madrid, Ministerio de Industria y Energía, 1979, para entender la paupérrima situación en que se encontraba tal sector antes de la llegada de los socialistas al poder político. Y, por último, nos remitimos a la desconocida obra de, ONAINDIA, Mario, *Otra herencia más: Plan Energético Nacional*, [s/l], Mario Onaindia Natxiondo, 1978. Para una visión global de todo este proceso, GARCÍA ALONSO, José M^a y IRANZO, Juan Emilio, “Sector energético: Hacia una nueva ordenación” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., pp. 129-152; y, CRUZ FERRER, Juan de la, *La liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico: modelos y análisis de la Ley 54-1997*, Madrid, Marcial Pons, 1999.

³³⁶ La normativa central que se ha tener presente de cara a cualquier tipo de examen es, primer lugar, el Real Decreto-Ley, 8/1983 de 30 de noviembre, *de Reconversión y Reindustrialización* [B.O.E. 3 de diciembre de 1983], al que pronto se sumará la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre *Reconversión y Reindustrialización* [B.O.E. 28 de julio de 1984]. A lo que se debe añadir la publicación del, *Libro Blanco sobre la reindustrialización* en 1983 [MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, *Libro blanco de la reindustrialización*, Madrid, Ministerio de Industria y Energía, 1983]. El Gobierno socialista también en este caso profundizaba en la línea de actuación mantenida por los gobiernos de UCD a partir de 1980, con la aprobación del Real Decreto-Ley, 9/1981, de 5 de junio, *sobre medidas para la reconversión industrial* [B.O.E. 10 de julio de 1981]. Véase aquí al respecto: Editorial, “¿Quién manda la economía?”, *El País*, 13 de junio de 1981. Un balance exhaustivo de esta primera etapa, MARÍN ARCE, José María, “La fase dura de la reconversión industrial: 1983-1986” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit., pp. 61-101. Para un análisis crítico de aquellos años el mantenido por el Gabinete Técnico Confederal de CCOO, ARAGÓN, Jorge y PARRÁ, Tomás, “Reflexiones sobre el Libro Blanco de la Reindustrialización”, *Economía Industrial*, n° 232, (1983), pp. 81-88, dentro del dossier monográfico *Crisis, ajuste y reindustrialización*. Y dentro de esa misma publicación colectiva, UGT, “U.G.T. ante el Libro Blanco de la Reindustrialización” (pp. 99-106). Para las cuestiones técnico-jurídicas, MONEREO PÉREZ, José Luis, *Las reconversiones industriales...*, op.cit.; GARCÍA BECEDAS, Gabriel, *Reconversiones industriales y ordenamiento laboral*, Madrid, Tecnos, 1989; y, MALARET i GARC, Elisenda, *Régimen jurídico-administrativo de la reconversión industrial*, Madrid / Barcelona, Civitas / Escola d'Administració Pública, 1991.

³³⁷ Sobre esta cuestión se volverá tanto en el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)” y en el Capítulo “11. En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero/febrero 1984-julio 1984)”.

³³⁸ ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, op.cit., p. 318. No obstante para otros autores a lo sumo se puede hablar de «[a]justes relativamente traumáticos como éste, aunque imprescindibles para mantener la competitividad a largo plazo, eran sólo entonces políticamente viables». MOLINA ÁLVAREZ de CIENFUEGOS, Ignacio, “La liberalización de la economía española (por efecto de la pertenencia a la Unión Europea)” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, op.cit., p. 300.

Los nombramientos de Enrique Moya (1982-1984) en aquel entonces Secretario del Círculo de Empresarios³³⁹ y de Luis Carlos Croissier (1984-1986)³⁴⁰ y José Claudio Aranzadi (1986-1988)³⁴¹ al frente del INI y luego como ministros de Industria, mostraron la clara orientación que se iba a seguir en el fin deseado de que el Instituto Nacional de Industria dejará de ser un *agujero* en los presupuestos del Estado³⁴². Con la consecuencia añadida de que el Gobierno socialista fomentaba por la vía de la intervención estatal una nueva concentración de medios económicos y financieros capitalistas. Unos medios financieros acostumbrados, por cierto, a una extendida cultura de la impunidad fiscal y a cualquier tipo de control sobre sus activos³⁴³. Como de nuevo ha señalado Javier Astudillo:

³³⁹ Enrique Moya Francés (1933-Madrid, 2007). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, su trayectoria personal le llevaría a ir ocupando diferentes cargos tanto en el sector público –por ejemplo, sería director de Química, Alimentos y Varios en el INI entre 1972-1974, y posteriormente pasaría por la dirección de diferentes holdings del grupo empresarial público– y del sector privado –junto con su cargo en el Círculo de Empresarios, tras su salida del INI sería nombrado presidente de Prosegur en donde se le acusaría, entre otros cargos, de blanqueo de dinero–. Hombre de aparato del cuerpo empresarial sería nombrado finalmente presidente de honor de la Asociación para el Progreso. Procedente del grupo de presión de Claudio Boada tan sólo estaría dos años al frente del INI. Su nombramiento, de hecho, provocaría «un pulso en el Consejo de Ministros en que se discutía. Boyer sacó adelante el nombramiento, pero hubo ‘momentos de tensión y aspereza’ notables en la discusión [...]». Primó la eficiencia buscada sobre otros criterios...» [VIDAL-FOLCH, Xavier, “Yo, Claudio”, *El País*, 16 de enero de 1983]. Dos años después sería sustituido tras una cuestionada gestión en casos no siempre aclarados como el de empresa Intelhorce. Véase también aquí lo apuntado en el Capítulo 5, *nota* 73.

³⁴⁰ Véase Capítulo 5, *nota* 54.

³⁴¹ Véase el Capítulo 5, *nota* 115.

³⁴² Tras la salida de José Claudio Aranzadi llegaría a la presidencia del INI, Jordi Mercader Miró (Port-Bou, Girona, 1943). Dr. Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y Máster de Economía y Dirección de Empresas por el ISSE. Tras su paso como Presidente por la empresa la “Industrias del papel y de la Celulosa, S. A.” llegaría al sector público, primero, como Presidente de “Empresa Nacional de Bazán de Construcciones Navales Militares” (1984-1988), y años más tarde sería nombrado Presidente del INI entre 1988-1990. Tras su salida pasaría al sector privado ocupando, entre otros cargos, los siguientes: consejero de Repsol YPF, presidente de la Sociedad de Aguas de Barcelona y actualmente es vicepresidente segundo de “La Caixa”. Entre 1990 a 1995 Francisco Javier Salas Collantes se haría cargo del INI. Nacido en 1948 y Licenciado en Economía le tocaría dirigir al INI en su proceso de desmantelamiento final. Todo ello junto la dirección del grupo TENEO (1992-1996). Con un largo historial en la empresa pública –entre otras direcciones dentro del entramado del Instituto Nacional de Industria sería Director de Planificación Económica y Financiera de ENUSA (1975-1978) o Director General de Gestión Corporativa (1988-1990)– se convertiría en el último presidente del INI. Tras su salida pasaría al mercado privado en donde ocuparía numerosas sillas de consejos de administración como en Red Eléctrica Española.

³⁴³ Dentro del Gobierno socialista no faltaron los *desencuentros* con los poderes financieros. Aunque muchas de las iniciativas como la de Alfonso Guerra en diciembre de 1990 de establecer lo que conoció como la “Ley de Hierro de los beneficios”, se quedarían en simple propuestas rápidamente desautorizadas por el mismo Felipe González; el equipo de Carlos Solchaga, con él en primera fila, tendrían enormes dificultades en establecer controles efectivos sobre la fiscalidad de los medios financieros. Ciertamente tampoco existió una voluntad política –tanto de recursos humanos como económicos– decidida al respecto. De hecho, no sería hasta la introducción del NIF en diciembre de 1990 (Número de Identidad Fiscal) cuando el Estado pudo acceder a los listados de los clientes de los bancos del país. Todavía más, pues, años más tarde en una coyuntura en donde la organización socialista ya se encontraba seriamente debilitada y se buscaban nuevas conformidades con su proyecto, se hablaría en un tono moderado de lo siguiente: «La moderación de las rentas del capital no puede hacerse por ley, como tampoco se puede fijar por esta vía las retribuciones del sector privado. Pero pueden establecerse normas fiscales que premien la reinversión de beneficios. Si una política de moderación de los dividendos se generalizará a todas las empresas, y si estuviera legitimada por el acuerdo en ella de la organización patronal, se alcanzaría un mayor efecto de creación de empleo en las empresas, potenciando el producido

«El mercado disfrutaba así de una preferencia indiscutida frente al Estado como sistema racional de asignación de recursos, lo que implicaba una retirada parcial del mismo (privatizaciones, desregulación limitada de los mercados de trabajo y capital)»³⁴⁴.

Aplicado al caso español, la internacionalización se llevaría por delante buena parte del tejido productivo patrio³⁴⁵. El milagro económico socialista consistió, precisamente, en una veloz implantación de una economía de servicios y del sector de la construcción. Características de la misma: falta de productividad y su carácter especulativo³⁴⁶. Sus efectos más inmediatos se concretaron una vez realizada una espectacular bajada de los aranceles, lo que producirían un fortísimo efecto desestabilizador de la por sí menguada y escasamente productiva estructura industrial del país. Sus consecuencias a medio y largo plazo: el cierre de decenas de pequeñas y medianas empresas –verdadero almacén de la economía del país– con el consiguiente aumento del desempleo.

Con todo, la internacionalización de la economía española se terminó por transformar en el eje central del proyecto modernización socialista así como de la reestructuración del modelo de acumulación capitalista español. Todo ello bajo tres grandes criterios:

- a) La competitividad internacional pasa a convertirse en el criterio fundamental de la eficiencia económica.
- b) Se impulsa el aumento de flujos internacionales de capitales y se incentiva la internacionalización de los procesos productivos. En el caso español, se produce a través de todas las formas posibles, y especialmente con la entrada de capitales, cualquiera que sea su naturaleza, carácter o las condiciones que se les pueda llegar a pedir en su caso.
- c) Otra consecuencia de la creciente internacionalización relacionada con la entrada en la CEE y el Sistema Monetario Europeo, será la pérdida casi definitiva de autonomía en relación a la política económica³⁴⁷.

por la moderación salarial». AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 33º Congreso del PSOE: Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo 1994, sig. Fc 1381, p. 24.

³⁴⁴ ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, op.cit., p. 156. Sobre este asunto consúltese, COMISIÓN PROGRAMA 2000, *La economía española...*, op.cit., y en concreto, “Capítulo X. El estado regulador, Estado productor”, pp. 145-153.

³⁴⁵ Una cuestión que tan sólo se reconocería –y nunca directamente– años más tarde por parte de los socialistas: «Hoy se constata que la penetración exterior en el mercado español no ha sido compensada por una expansión equivalente de las empresas españolas en el comercio internacional. Lo que ha motivado la destrucción de parte del tejido productivo». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria de gestión de los órganos federales [al] 33º Congreso del PSOE. Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo de 1994, sig. Fc 1378, p. 28.

³⁴⁶ En 1991 la UGT, una vez consumada totalmente la ruptura de la familia socialista, denunciaría, de forma abierta, los efectos negativos de las políticas neoliberales de aquellos años, llegándose a hablar de ‘desertización industrial’ «En el ámbito de nuestro país, estamos constatando, cada vez con mayor nitidez, las negativas consecuencias de una política neoliberal basada en la errónea creencia de que el sector servicios podía sustituir a la industria como base del desarrollo económico. La desertización industrial acelerada que están sufriendo amplias zonas no es producto de casualidad sino de los planteamientos determinados». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “III Comité Confederal. «Informe de Gestión de la Secretaria General»”, Madrid, 28 y 29 de noviembre de 1991, sig.ant. A/37/09-11 pp. 36-37.

³⁴⁷ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., pp. 58-65. La propia autora termina preguntándose: «En ocasiones se hace muy difícil no preguntarse si la opción internacionalizadora no enmascara la incapacidad para proponer otras alternativas». *Ibidem*.

Una *decidida* voluntad política –aunque siempre sometida a los “escrutinios” de las clases dominantes– una firme y unívoca política económica a aplicar sin prácticamente titubeos, junto con el convencimiento de que no existía otra alternativa posible, se convertirán en tres de las constantes fundamentales de la puesta en marcha del gran proyecto económico de los gobiernos socialistas. Dados por superados los *viejos dilemas* de la socialdemocracia europea clásica, los *trade-off* a los que se tuvieron que enfrentar primero Boyer y más tarde Solchaga, respondían a nuevas lógicas, pero que en ningún caso iban a cuestionar la supremacía del mercado como el sistema en donde desarrollar la estrategia socialista. Con o sin el calificativo de socialdemócrata, progresista o solidaria, lo cierto es que la política aplicada por los socialistas respondió, en suma, a los postulados del nuevo liberalismo, aunque como es lógico con las particularidades propias de cada país. *Misión* para la que contarían tanto con el apoyo de poderosas instituciones internacionales con el FMI por delante, como con el soporte teórico de buena parte de la academia liberal.

En resumen, *La «revolución burguesa pendiente»* ha venido a demostrar como más allá del lenguaje político socialista y de la propia cultura política que promueve a través de sus publicaciones o sus documentos internos, los gobernantes y principalmente sus técnicos, impulsaron la reestructuración la segunda fase del capitalismo español bajo unas bases clásicas. Sobre sus resultados políticos, económicos, sociales, laborales se dará cuenta en los siguientes apartados, a partir de donde se podrá refutar si finalmente aquella sería una mera *política instrumental* –por más que no fuera, según la doctrina socialista de la época, la política que ellos hubieran querido llevar adelante– de cara a obtener un conjunto de resultados sociales en clave de la socialdemocracia europea tradicional.

7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de crecimiento

«Un cierto ‘materialismo político’ dominó los programas del cambio; Felipe González declaró con frecuencia que aunque consideraba que el funcionamiento de la economía tenía sólo carácter instrumental para las ‘políticas finalistas (las referidas a la educación, la sanidad, la cultura del trabajo, la vivienda, etc.), la ‘eficiencia económica’ era una precondition para la ‘eficiencia social’. El creciente ‘realismo’ de las políticas económicas socialdemócratas en Europa a lo largo de los ochenta se reforzó en España por el objetivo de recuperar los atrasos respecto de los países europeos».

José María MARAVALL, *Democracia y socialdemocracia*¹.

«Una consecuencia políticamente fatal de [la] identificación del socialismo con el capitalismo es la creencia de que cualquier política que obstaculiza la acumulación y el desarrollo del capital es por ello un avance hacia el socialismo [...]. La izquierda necesita un proyecto de socialismo factible que no identifique el ascenso histórico de los trabajadores con las simples subidas salariales, ni el control social de la producción social con la ampliación *per se* del sector público, ni el progreso hacia la igualdad social con el crecimiento del gasto público; un proyecto que analice con realismo y rigor en qué condiciones el poder sindical es un avance hacia el control social de la producción y en qué condiciones es una pura forma de corporativismo, además de un obstáculo para el desarrollo de la sociedad en su conjunto».

Ludolfo PARAMIO, *Tras el Diluvio*².

Examinado en el apartado anterior, el marco estructural económico en donde se inserta la llegada de los socialistas al poder en diciembre de 1982, así como las precauciones y reuniones –incluidas aquí un conjunto de conspiraciones y determinados *pactos*– que se tendrían con los representantes empresariales de la mano de la CEOE antes de dar cualquier paso político, o la puesta en marcha del PEMP a través de los tres pilares sobre los que se asentó la denominada estrategia de la modernización socialista; corresponde examinar cómo y de qué manera aquel conjunto de decisiones económicas y políticas –por este orden y no otro– modificaron el sistema productivo español. Y con él, el cierre de la segunda fase de la reestructuración del capitalismo español.

En este capítulo, se presenta una visión histórica de la economía política del socialismo español entre 1982 a 1992. Año tras año escrutaremos las tres grandes fases económicas que se suceden en este periodo. Políticas económicas de carácter liberal que se mantendrán sin mayores variaciones, tal y como se evidenciará con el examen de los Presupuestos Generales del Estado año tras año, entre otros muchos caminos de aproximación adoptados. De esta forma, se establecerá el contexto económico-político necesario, junto con los principales datos macroeconómicos, de cara a analizar en el siguiente apartado, de forma detenida, la profunda transformación de la economía española, incluyéndose tanto la metamorfosis por la que atravesaría el mercado de trabajo y el siempre precario estado del Bienestar. En suma, se trata de un espacio que permite visualizar, a un nivel global, la *dirección* y los *costes* de la llamada

¹ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia..., *op.cit.*, pp. 56-57. Años después, las tesis de Maravall serían refrendadas ampliamente por la propia organización socialista de cara a *justificar* su orientación política: «[N]os hemos guiado por criterios de pragmatismo»; «gestión pragmática del presente». AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 33º Congreso del PSOE: Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo 1994, sig. Fc 1381, p. 15.

² PARAMIO, Ludolfo, *Tras el diluvio...*, *op.cit.*, pp. 28-29. Del mismo autor, id., “La izquierda y la crisis económica”, *Leviatán*, n° 16, (1984), pp. 125-132.

salida progresista dentro de la “década del ajuste solidario”. Términos estos últimos de uso frecuente dentro de la *narrativa socialista*.

A modo de *apéndice* se incluye, asimismo, lo que se ha denominado como un “anexo obligado”. En él se explora, a buen seguro, uno de los acontecimientos más relevantes a la par que más recordados tanto de la historia contemporánea española reciente, como de toda la época socialista. Nos referimos a la convocatoria y al desarrollo de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. No sólo, pues, también se recorrerán sus antecedentes, a través de la *ruptura* de la familia socialista así como las múltiples consecuencias que conllevará la posterior gestión del 14-D. Todo un conjunto de hechos históricos claves para dirimir, con precisión, la naturaleza de la economía política socialista y, a su vez, las respuestas sociales y sindicales contra la precarización del mercado de trabajo y sus efectos más negativos para el conjunto de la clase asalariada.

Vaya también por delante, tal y como ya se ha destacado previamente, que entre las previsiones gubernamentales y las posteriores realidades económicas, distó un abismo. El modelo de crecimiento –más allá de sus éxitos, fracasos y limitaciones– terminó siendo bastante diferente al ideado por los economistas y técnicos socialistas, por más que, en adelante, no se dejara de insistir en los grandes logros conseguidos, incluido en tal repertorio un muy precario diálogo social³. Eso sí, sin autocrítica alguna en la inmensa mayoría de los casos⁴. Confundiéndose en la práctica, o cuando menos no diferenciando adecuadamente, “el crecimiento económico cuantitativo y el objetivo del desarrollo económico”⁵. Inclusive otros autores han ido más lejos: “España con los socialistas es un ejemplo de crecimiento sin desarrollo”⁶. De este modo, se puede avanzar una primera conclusión en boca del historiador Julio Aróstegui, y que nos da cuenta de por donde transcurrieron los acontecimientos:

³ Los ejemplos son múltiples. En 1990 los socialistas declararían: «El periodo que abarca los últimos años puede catalogarse, sin ambages, como el de mayor éxito de nuestra reciente historia económica y social por las siguientes características: su amplitud y profundidad; la mayor vertebración del entramado económico; su realización en un contexto de creciente apertura e interdependencia externas; y la extensión del beneficio social que ha llevado aparejada. Desde el punto de vista de las relaciones sociales se ha cubierto de forma completa un ciclo iniciado con la confrontación –como estrategia sindical– y que parece finalizado con la superación de la fase anterior a través del diálogo social». AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, p. 20.

⁴ Un ejemplo altamente revelador: «Es decir, se aplicó una política económica que había tenido éxito en muchos lugares, pero que en otros había terminado en un rotundo fracaso, a pesar de la coherencia interna de la misma. Si en España no fue así, la explicación hay que buscarla fuera de la lógica intrínseca de las medidas de política económica. Si se quiere encontrar una explicación adecuada el mejor lugar para ello está en la propia política, en las dosis de coherencia, de estabilidad y de gobernabilidad que los socialistas proporcionaron a la sociedad española como consecuencia del enorme apoyo popular conseguido en 1982. Hubo éxito en la política y en la política económica, ya que se produjo una contundente actuación política, una fuerte colaboración social y una extensa y profunda acción reformadora». FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 153.

⁵ ALBURQUERQUE, Francisco, “Una crítica al..., op.cit., p. 136. Y añadía: «[L]o cierto es que por parte de los dirigentes (tanto políticos como técnicos actuales), parecen haberse olvidado dicha cuestión elemental, idealizándose totalmente la velocidad o ritmo de crecimiento como el indicador principal (y casi único) del éxito del proceso de modernización tecnoeconómica emprendido, suponiendo que ello ha de conllevar la elevación del ingreso y la mejora de las condiciones de vida material del conjunto de la población». Ibídem. En esta línea, véase también, YABAS, Antonio, *Cambio social y desarrollo económico: de la modernización a la perspectiva del sistema mundial*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1985.

⁶ PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, op.cit., p. 57.

«El Gobierno del PSOE no transformó de ninguna manera ni el orden social ni la mayor parte de las estructuras económicas [...]. Se observa la ausencia absoluta desde el principio de cualquier designio de modificar de forma notoria el régimen de dominación económica»⁷.

7.1. Balance de una «década de ajuste solidario»

7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)

La *salida* a lo más duro de la crisis se comenzaría a producir en 1985. Concluía la fase de duro ajuste pero también la más reformista en forma y fondo⁸. Etapa que dirigida por Miguel Boyer ha llegado a ser calificada –tanto por la escuela liberal-conversadora como por la que podría definirse como liberal-progresito– como la más “eficaz y fructífera de todo el periodo el período de la vida política española liderada por el PSOE”⁹. Ahora bien, hasta llegar a la citada etapa de crecimiento que se alargará hasta 1990, se atraviesa una primera que se ha de situar entre 1983 a 1985/1986¹⁰.

Aunque realmente los primeros efectos reales de las decisiones gubernamentales comienzan a *sentirse* en 1984, el desarrollo económico del año anterior ya depara algunas notas características a tener en cuenta. El “optimismo razonable” sobre la evolución económica para esas fechas, se convertirá en la tónica dominante entre las filas socialistas, todavía más reforzada con los resultados de varias encuestas electorales y la arrolladora victoria en las elecciones municipales del 8 de mayo de 1983¹¹. Queda claro en 1983 como se opta por “elevar

⁷ ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, op.cit., p. 313. Y añadía el autor: «Pero sí se practicó un reformismo social, cultural y educativo, enraizado en el reformismo burgués español del primer tercio del siglo XX, europeizante, que insistió en la idea de ‘modernización’ y que se volcó en cuestiones como la enseñanza pública y laica, las obras de infraestructura, la primacía de lo civil sobre lo militar, la libertad en las conductas sociales, etc.». Ibídem. Más crítica se mostraría Miren Etxezarreta: «El gobierno no sólo no ha presentado un talante socialista en lo económico, sino que ha realizado planteamientos muy limitados en todos los aspectos de la vida social, con un profundo y acentuado respecto por todos los poderes fácticos, inclinándose en todas las ocasiones por las opciones más conservadoras». ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 88. Por su parte, una vez más, James Petras señalaría como los «socialistas carecían de voluntad política suficiente para romper las relaciones establecidas en el Estado, en la economía y en la sociedad. Esta última vía requería intentos de movilización a las masas fuera del aparato del Estado». PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, op.cit., p. 36.

⁸ Sobre sus primeros resultados nos remitimos a, CRUZ ROCHE, Ignacio, DESDENTADO, Aurelio y RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, *Política social y crisis económica. Aproximación a la experiencia española*, Madrid, Siglo XXI, 1985. En otra línea entre lo político y lo académico, MONREAL LUQUE, Alberto (coord.), *El coste social de la crisis económica española y las líneas básicas de una política de recuperación*, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia, 1983.

⁹ MARTÍN ACEÑA, Pablo y MORENO, Begoña, “Miguel Boyer Salvador” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, op.cit., p. 211.

¹⁰ Los datos que se emplearán a continuación, y en tanto no se indique lo contrario han sido extraídos de, MALO de MOLINA, José Luis, “Una visión macroeconómica...”, op.cit.; y de, MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, op.cit.. Ambos economistas trabajan con datos ‘oficiales’ aunque la revisión y actualización de no pocas estadísticas introducen pequeñas diferencias porcentuales. Sobre todas estas cuestiones a nivel tanto técnico como metodológico, se han planteado las oportunas apreciaciones en el apartado “2.3.1.2. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

¹¹ «La mejora de la economía, aún lenta, no tardará en ofrecer resultados de gran alcance popular, al proyectarse sobre el empleo, con lo que puede anunciarse ya, con razonable optimismo, que la década negra del paro ha tocado fondo y comienza la recuperación». PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *Un año para...*, op.cit., p. 15. En el mismo documento informativo-propagandístico no se dejaba pasar la oportunidad para remarcar el incremento de intención de voto según varias encuestas

las medidas estabilizadoras a categorías permanentes”¹². Prueba de ello sería la intervención en el Congreso de los Diputados el 23 de enero de 1983 de Miguel Boyer, quien se estrenaba en tales lides. Su objetivo, la aprobación de los PGE de aquel mismo año en curso –una vez que habían sido los anteriores prolongados¹³– y en donde el *reto* por alcanzar los equilibrios macroeconómicos comenzaría a tomar forma¹⁴. Una política que tenía su antecedente más directo en la propia decisión de devaluar la peseta unos meses antes. Decisión que va a devenir en central para frenar la “huída” de reservas extranjeras ante el riesgo de un posible “gobierno socialista”. Tan sólo en el mes de octubre de 1982, 1.323 millones de dólares se van a *perder*, a lo que se sumaba como entre diciembre de 1981 a septiembre de 1982 las reservas cayeron en 2.625 millones de dólares, un 17 por 100 de las totales¹⁵.

Lo dicho, va a ser a partir de 1984, como ha destacado Alberto Montero, cuando puede identificarse “nítidamente el sentido de la política económica que pensaba aplicar” los gobiernos socialistas. Una fecha donde se podría ya percibir el “espíritu ortodoxo que la impregnaría”¹⁶. Esto no significa que a lo largo del año anterior no se pueda intuir la clara orientación *liberal*, pero ahora se adoptara como la “única política posible” sin más contradicciones ni

(*Tiempo y Cambio* 16) en uno de los peores momentos económicos (pp. 18-19). Más años el *optimismo razonable* daría paso, según el lenguaje político de su tiempo, al *optimismo moderado*. Véase para esto último, AHFPI, PSOE-CEF, “La política social (1983-1987)”, Madrid, abril de 1988, sig. Fc 6817, p. 111.

¹² ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 48. Consúltese, en este sentido, DEHESA, Guillermo de la, “La política económica frente a la crisis”, *Información Comercial Española*, nº 617-618, (1985), pp. 7-18 dentro del monográfico *Diez años de política económica española*.

¹³ Real Decreto-Ley 24/1982, de 29 de diciembre, *de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria* [B.O.E. 31 de diciembre de 1982]. Normativa extremadamente significativa de los tiempos y del contexto político en donde se tomaron las primeras decisiones de carácter económico. Por último, poco tiempo después el propio Boyer dejaría bastante claro su concepto de *planificación económica*: «Yo le doy una gran importancia a pesar de que tengo una concepción liberal del socialismo. En primer lugar, sirve para dar coherencia a una serie de elementos hasta ahora desconectados. Tan importante como eso es demostrar que existe una salida razonable a la situación muy difícil en que está España en estos momentos. La visión a corto plazo ha extendido la idea de que este país no tiene arreglo. Y hay que decir que sí, que este país tiene salidas que exigen tiempo, esfuerzo y disciplina, pero que abocan a una situación mucho mejor. Y hay un tercer factor fundamental de la planificación, que permite ver las consecuencias a medio plazo, de actuaciones tomadas día a día. Entonces yo creo, que la planificación, al considerar diversas alternativas, nos permite medir los pequeños pasos cuidadosamente». En declaraciones en, PSOE, *Hacia el cambio...*, *op.cit.*, pp. 124-125. Véase también para una correcta interpretación: COMÍN, Francisco, “El papel del presupuesto en el crecimiento económico español: una visión a largo plazo”, *Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic History*, vol. XII, nº 2, (1994), pp. 311-316. Véase, asimismo, Capítulo, *nota 151*.

¹⁴ BOYER, Miguel, “Presentación en el pleno del Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983”, *Hacienda Pública Española*, nº 82, (1983), pp. 19-50; y, id., “Opiniones”, *Papeles de Economía Española*, nº 16, (1983), pp. 366-368. Y también, BORRELL, Josep, “La política presupuestaria para 1983”, *Hacienda Pública Española*, nº 82, (1983), pp. 51-54.

¹⁵ BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, *op.cit.*, pp. 88-89. Consúltense dentro del dossier monográfico de *Información Comercial Española*, nº 617-618, (1985), titulado *Diez años de política económica española (1974-1984)*, los textos de, ARGANDOÑA, Antonio, “La política monetaria española, 1973-1984” (pp. 67-80); y de, FERNÁNDEZ, Vicente Javier, “Economía y política de la peseta, 1974-1984”, (pp. 81-100).

¹⁶ MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 126.

ambigüedades. Un aspecto reconocido por la inmensa mayoría de economistas y demás investigadores¹⁷.

En todo caso, en el arranque de la superación de la crisis va a influir la postergación “innecesaria [...] [del] ajuste «positivo» de la caduca estructura empresarial mediante el acrecentamiento de los márgenes, más allá de los que la libre competencia empresarial permitiría”¹⁸. La “herencia recibida” pesaba pero todavía pesaría más en la estrategia de la modernización, muchas de las incoherencias mantenidas a lo largo del tiempo por los diferentes ejecutivos socialistas, con respecto a la reforma de la estructura empresarial privada¹⁹. Mientras que, por otro lado, no se tuvieron las mismas “dudas” con respecto al sector empresarial público, en donde la “promesa electoral” de no ampliar el mismo se llevaría a cabo. Un sector público que a “principios de la década de los ochenta [...] contabilizaba cerca del 10 por ciento del valor añadido nacional y la compensación total a empleados, y casi el 15 por ciento de toda la formación bruta de capital fijo”²⁰. Desde la minería pasando por la industria del aluminio o la construcción naval, hasta el transporte u otros tantos sectores productivos, configuraban un sector empresarial, que heredado directamente del franquismo, venía lastrado tanto por las enormes pérdidas como por su carácter escasamente competitivo²¹.

Llámesese *saneamiento*, o directamente la *reconversión industrial*, una parte del colosal esfuerzo de ingeniería político-económica socialista, se dirigió, precisamente, al desmantelamiento progresivo –bajo la máxima de la *racionalización*– del entramado industrial público. Se optó, por tanto, por uno de los posibles caminos, a partir de una clara instrumentalización de las propias “credenciales obreras” del PSOE, lo que le hacía “especialmente apropiado para dirigir esta transformación”²².

¹⁷ Por dejar apuntado un ejemplo tan concreto como suficiente. Incluso un viejo falangista como Juan Velarde Fuentes no ha dudo tildar en más de una ocasión dicha orientación política de tal forma. VELARDE FUERTES, Juan, “Orígenes y evolución del actual modelo español de política económica”, *Papeles de Economía Española*, vol. II, n° 100, (2004), pp. 2-9, dentro del dossier, *25 años de Información Económica*.

¹⁸ MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 128.

¹⁹ Sobradamente fundamentada estaría en su día la crítica de Jordi Víctor Sevilla: «Hay que reconocer, pues, que la situación de partida del nuevo gobierno –‘la herencia económica recibida’– era difícil y desgraciadamente en el ámbito político no pueden aceptarse las herencias a beneficio de inventario. Ahora bien, con todo, la ‘herencia’ auténticamente difícil, como ha demostrado el tiempo transcurrido, no eran tanto los deprimidos niveles económicos internos, ni siquiera la preocupante tendencia y el nivel alcanzado por el déficit exterior, sino el predominio de los comportamientos de adaptación pasiva o, si se prefiere, los hábitos adquiridos por el mundo económico durante el anterior régimen político, que son, en esencia, los que nos han permitido explicar la ‘crisis diferencial’ de la economía española». SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política...*, *op.cit.*, pp. 158-159. Véase asimismo lo ya apuntado en el “6.1.3. La crisis económica diferencial española: la construcción de las «condiciones necesarias»”.

²⁰ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 168.

²¹ Consúltase al respecto, MALO de MOLINA, José Luis y ORTEGA, Eloísa, “El excedente bruto de explotación en la industria española y aproximaciones a la evolución de la tasa de rentabilidad” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, *op.cit.*, vol. II, pp. 695-714.

²² PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, *op.cit.*, p. 54. Véanse también, ALBENTOSA, Luis, “La política de ajuste aplazada: reconversión industrial”, *Información Comercial Española*, n° 617-618, (1985), pp. 175-192, dentro del dossier monográfico titulado, *Diez años de política económica española (1974-1984)*; y, NAVARRO, Mikel, “La política de reconversión industrial en España”, *Información Comercial Española*, n° 665, (1989), pp. 45-69. Véase también lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 33*, entre otras, y en concreto el apartado “8.2.1. «La obsesión enfermiza»”.

Frente a una posible reestructuración económica del INI, se abordó la reestructuración del marco público empresarial bajo y por los objetivos del mercado y de cara a competir en los mismos. Una opción que conectaba plenamente con el afán de impulso del capital privado en detrimento de lo público. Por esta misma vía del *asistencialismo empresarial privado*, el Gobierno socialista actuaría en la práctica como un actor o sujeto relevante del *cambio* del modelo productivo²³. El caso más simbólico que no el más costoso sería el de SEAT, primero nacionalizado tras la “huida” del grupo empresarial FIAT, saneado en tiempos socialistas –cerca de 350.000 millones de pesetas se calcula que costaría tal operación– y posteriormente, vendido y reprivatizado al Grupo Volkswagen, quien adquiriría el 100% de todas las acciones en 1986 a un precio netamente inferior a su valor en el mercado²⁴.

Asimismo el coste monetario y de puestos de trabajo de la reconversión va a ser simple y llanamente desmesurado. Por ceñirnos a los datos oficiales/oficiosos: “A partir de una plantilla máxima de 254.000 trabajadores en 1980, se llegó a una fuerza laboral de 147.000 en 1990, tanto por bajas de las empresas como por la privatización de cuarenta y seis de éstas (doce de gran tamaño)”. Y en cuanto al coste económico, las,

«transferencias de explotación y de capital por el Estado al INI alcanzaron 841.000 millones entre 1983 y 1986. Los resultados agregados de las empresas del Grupo INI tuvieron su momento peor en 1983, con pérdidas cifradas en unos 204.000 millones de pesetas, y comenzaron a mejorar al año siguiente, llegando a un máximo positivo de 70.000 millones en 1989»²⁵.

Asimismo debía sumarse los 850.000 trabajadores industriales que van a perder su empleo entre 1975 a 1985. Es decir un -24,4% del total de ocupados en dicho sector. Pero también existieron otras consecuencias indirectas, pues el *ataque* a lo “público” identificado con “ineficiente” tendría un protagonista: el INI y su desmantelamiento²⁶. Todo ello acompañado de fuertes conflictos obreros que llegarían en ocasiones a estallidos de violencia y a desestabilizar un inestable marco de operaciones políticas²⁷.

²³ COLECTIVO IOE, “Características de la desigualdad en el Estado español” en *La sociedad de la...*, *op.cit.*, p. 31.

²⁴ Los datos de SEAT proceden de, ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, *op.cit.*, p. 344. Por su parte Francisco Fernández Marugán ofrece la cifra de 185.266 millones de pesetas. FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 159. Sobre la historia de esta emblemática empresa en el transcurrir de la historia contemporánea del país nos remitimos a, MIGUÉLEZ, Faustino, *SEAT la empresa modelo del régimen*, Barcelona, Dopesa, 1977; SÁN ROMÁN LÓPEZ, Elena, *La industria del automóvil en España: el nacimiento de SEAT*, Madrid, Fundación Empresa Pública, 1995; y finalmente, el notable trabajo de investigación de, TAPPI, Andrea, *Un'impresa italiana...*, *op.cit.*.

²⁵ BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, *op.cit.*, p. 94. Véase asimismo el dossier monográfico que dedicó al asunto *Papeles de Economía Española*, nº 38, (1989) en donde resaltan los trabajos de, MARTÍN ACEÑA, Pablo y COMÍN, Francisco, “El grupo INI en perspectiva histórica: una aproximación cuantitativa (1941-1986)” (pp. 106-134); JAUMANDREU, Jordi, MATO, Gonzalo y FARIÑAS, Juan Carlos, “La empresa pública española: 1981-1986” (pp. 199-216); o el ya citado de, ARANZADI, Claudio, “La política de desinversiones...”, *op.cit.*. Balances de conjunto en: CALLE SÁIZ, Ricardo, “La reconversión industrial: la empresa pública” en ALBI IBÁÑEZ, Emilio (coord.), *La Hacienda Pública...*, *op.cit.*, pp. 180-210; y, por último, COMÍN, Francisco y MARTÍN ACEÑA, Pablo (eds.), *Historia de la...*, *op.cit.*.

²⁶ De obligada lectura, MARTÍN ACEÑA, Pablo y COMÍN, Francisco, *INI: 50 años de...*, *op.cit.*. Véase asimismo lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 335*.

²⁷ Aunque no esté el espacio concreto deben señalarse las importantes, numerosas y en ocasiones violentas huelgas generales a nivel regional durante los años ochenta por buena de toda la geografía española. Uno de los ejemplos más conocidos por su intensidad serían los incidentes de Reinos en la

Lo anterior por el lado de las reformas estructurales pero por el lado de la oferta – principal vía de actuación de los gobiernos socialistas en una situación de crisis presupuestaria²⁸– debe tenerse presente que la *salida a la crisis* se produciría en un momento en que la capacidad recaudatoria del Estado era limitada. El contexto de partida no fue nada sencillo, pues los “ingresos procedentes de impuestos, un 32,4 por ciento del PIB en 1982, estaban aún uno ocho puntos porcentuales por debajo de la media europea”²⁹. La concreción de una nueva política fiscal que venía lastrada por las insuficiencias de la reforma de los gobiernos de UCD en 1977 y por el extendido fraude fiscal aparecía –como ya se adelantó– como un requisito imprescindible, tanto de cara a sanear la estructura económica como de cara a financiar el proyecto modernizador³⁰.

Dos por tanto serán las metas durante estos tres primeros años, con el condicionante *ad hoc* de que una política fiscal por parte de un gobierno socialdemócrata tenía que tener –o al menos debería *guardar* las apariencias– un carácter progresivo y redistributivo, ante el riesgo potencial de perder parte de su base social y electoral. Dicho en el lenguaje político de la época se buscó una “moralización general” contra el fraude fiscal³¹. En todo caso, aquí tropezaría la

primavera de 1987. Movilizaciones, conflictos, que han pasado las más de las veces desapercibidos en los grandes relatos de este tiempo, a pesar de su vital importancia para interpretar el conjunto de respuestas que se desarrollarían en paralelo a la puesta en marcha de la estrategia de la modernización socialista. Además de lo que se apuntará en una parte de nuestro estudio de caso [Capítulo “11. En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero/febrero 1984-julio 1984)”] y junto con lo apuntado tanto en el Capítulo 3 como en el Capítulo 6 a nivel bibliográfico, véase aquí: WOZNIAK, Lynne Marie, *Industrial restructuring and political protest in Socialist Spain*, Ann Arbor (Michigan), U.M.I., Dissertation Services, 1994. Para casos concretos –aunque ciertamente la bibliografía sea limitada– véanse entre otros pocos ejemplos ya citados: FLORIDO del CORRAL, David, GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis y ROCA MARTÍNEZ, Beltrán, *El pueblo en...*, *op.cit.*; y, SÁEZ GARCÍA, Miguel Ángel y DÍAZ MORLÁN, Pablo, *El puerto de...*, *op.cit.*. En cualquier caso, para el caso asturiano sí se puede hablar de una amplia bibliografía, prácticamente, a modo de *excepción* a resaltar. Entre otros trabajos: BENITO del POZO, Carmen, “Cambio económico, acción sindical y conflicto: el sector naval en Asturias, 1982-1985” en TUSELL GÓMEZ, Javier [et al.] (eds.), *Historia de la Transición y consolidación democrática en España (1975-1986) [Congreso Internacional. Historia de la Transición y Consolidación Democrática en España], II vols., Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia / Universidad Autónoma de Madrid, 1996, vol. II, pp. 397-410; GARCÍA PIÑEIRO, Ramón, “Minería y huelga general: una década de huelgas generales en la minería del carbón. España, 1982-1991” en BONAMUSA, Francisco (ed.), *La Huelga General...*, *op.cit.*, pp. 213-234; id., “¿El ocaso de un mito? Movilizaciones y radicalismo minero durante la Transición (1977-1982)”, *Sociología del trabajo*, nº 30, (1997), pp. 123-148; KÖHLER, Holm-Detlev (coord.), *Asturias, el declive de una región industrial*, Gijón, Trea, 1996; o VEGA, Rubén, *Crisis industrial y...*, *op.cit.**

²⁸ Véase, JUAN PEÑALOPE, José Luis de, “Ocho años de reforma tributaria”, *Información Comercial Española*, nº 617-618, (1985), pp. 133-144, dentro del dossier monográfico titulado, *Diez años de política económica española (1974-1984)*.

²⁹ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 162. Para una comparación a nivel internacional, ANDRÉS, Javier, MOLINAS, César y TAGUAS, David, “Convergencia, pacto social y política fiscal: una evaluación macroeconómica”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. I, nº 2, (1993), pp. 5-23.

³⁰ Además de la bibliografía que se señalará en el presente apartado, véase en el Capítulo 8, *nota* 217 y *nota* 229.

³¹ BOYER, Miguel, “Por la solidaridad hacia la salida de la crisis” en PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *Un año para...*, *op.cit.*, p. 122. Como señaló Carles Boix: «En consecuencia, la lucha contra el fraude fiscal pronto se convirtió en una de las claves de la estrategia económica del PSOE, tanto por el empeño puesto por el gobierno como por el simbolismo político que adquirió a lo largo de la década. Después de que un consejo de ministros anunciara en 1983 que la lucha contra el fraude fiscal se convertiría en una de las más altas prioridades del gobierno, se puso en práctica inmediatamente una serie de cambios para mejorar las capacidades auditora e informativa de Hacienda». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, pp. 164-165. En todo caso, como han destacado buena parte de los *entendidos* lo cierto es que esta ‘moral’ de la solidaridad fiscal no llegaría a calar: «Su éxito ideológico es más incierto. La ideología dominante propugna centralmente la insolidaridad cotidiana.

voluntad política más o menos decidida con la falta de medios y una extendida impunidad fiscal heredada del franquismo, entre otros factores menos confesables³².

El estudio y conocimiento de la historia ayuda a observar como en determinadas situaciones, cuando un Gobierno ha tenido la enérgica y necesaria *voluntad política* de actuar y modificar una situación que consideraba injusta o perniciosa, ha conseguido, en no pocos casos, resultados positivos e inclusive inesperados. La anterior reflexión deviene en central para entender y explicar qué sucedió con la reforma fiscal que pondrían en marcha los socialistas, y cuyo resultado final sería radicalmente diferente del inicial bosquejado.

Y conviene detenerse en esta cuestión, ya que es del todo aclaratoria tanto de determinadas *voluntades políticas*, de determinados *márgenes de actuación* como de determinadas *convivencias* con los poderes fácticos de la nación por parte de los propios socialistas. Argumentos e ideas que plantearon en su día desde el sociólogo liberal Víctor Pérez Díaz³³ al historiador Julio Aróstegui³⁴, cuando hablaban, precisamente, de cómo a lo largo de la época socialista no se cuestionaron la estructuras de poder, ni tampoco se tuvo mayor pretensión de realizar cambios profundos en la configuración del modelo productivo³⁵.

El contexto previo a la llegada de los socialistas ya se ha descrito. Quizás cabría añadir como ha recordado Mariano Guindal que la propuesta de reforma fiscal –junto con la liberación de las Cajas de Ahorro– diseñada por Fuentes Quintana en su momento a raíz de los *Pactos de la Moncloa*³⁶, le granjearían el odio visceral de la CEOE, y de paso terminarían con su carrera política, tal y como le sucedería a otros ministros que *pecarían* de sociales como en el caso de

Pero ello, sin ningún reajuste cohesionador y compensador, podía provocar un desbordamiento del enfrentamiento competitivo». Añadiendo: «[L]a ideología de la solidaridad fiscal tiene objetivos mentalizadores. Desea que esta creencia social no esté sostenida por permanentes alegatos persuasivos y se incluya en el sistema de convicciones permanente y natural. Bajo este enfoque a lo largo de los años 80, el discurso se ha ido afianzando, interiorizando progresivamente». IBARRA, Pedro, IDOYAGA, José Vicente y ZALLO, Ramón, “Ideologías y medios de comunicación en los 80” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., pp. 745-746.

³² En 1975 el número de Inspectores Técnicos Fiscales era de 1971. Quince años más tarde se había incrementado a 1.629 y un lustro después a 1.872. Cifras en todo caso considerablemente bajas teniendo en cuenta que sólo el número de declaraciones anuales del IRPF para las últimas fechas superaba los doce millones. Datos extraídos de, JORDANA, Jacint y RAMIÓ, Carles, “Gobierno y administración” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de...*, op.cit., p. 1008, Cuadro 13.2, “Evolución del total de efectivos de algunos cuerpos de funcionarios de la Administración Central, 1934-2000”.

³³ PÉREZ DÍAZ, Víctor, *España puesta a...*, op.cit., p. 52.

³⁴ Véase nota 7.

³⁵ Durante las semanas previas que antecedieron y siguieron a la huelga general del 14 de diciembre, desde los editoriales de *El País* se llegaría a denunciar la acomodación cuando no la colaboración de los socialistas con las clases dominantes, y su falta de voluntad política a la hora de transformar las estructuras del poder. Véase, por ejemplo, Editorial, “Los vencidos, vencidos, los vencedores, perdidos”, *El País*, 13 de diciembre de 1988. Sobre esta misma cuestión nos remitimos a “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

³⁶ Sobre la trascendencia y posteriores opiniones al respecto de Fuentes Quintana véase el Capítulo 6, nota 292 y el Capítulo 8, nota 214. En términos más genéricos sobre la importancia de la citada reforma fiscal tras los Pactos de la Moncloa, nos remitimos, primero, al apartado “4.2.2.1. Construcción de un socialismo para la conquista del poder político (1977-1979)”, y en segundo lugar al apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”, y de forma concreta al apartado “9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. *Los arduos inicios de la flexibilización* (octubre 1976-marzo 1980)”.

Jiménez de Parga³⁷. “La patronal no se lo perdonó nunca y Carlos Ferrer no se cansaría de repetir a lo largo de sus siete años como presidente de la CEOE que todos los males de la economía española se generaron con aquellos acuerdos”³⁸. Una reforma fiscal, por cierto, que nunca se desarrollaría plenamente en todos sus puntos, y que inclusive la conocida medida de publicitar en la prensa los nombres de los defraudadores terminaría siendo rápidamente retirada, bajo pretextos políticos relacionados con la seguridad ciudadana. En aquella ocasión el Gobierno de la UCD contaría con no pocos apoyos por parte de las minorías catalana y vasca para tales tareas, a través de una nueva redacción del artículo 40 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, *del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*. Todo ello tan sólo tres años después de su aprobación³⁹.

Sin mayores excesos ni radicalismos, los socialistas esbozarían su propuesta de reforma fiscal en su programa electoral *Por el cambio* en 1982⁴⁰. Más allá de lo que se apuntará en el siguiente capítulo acerca de la extensa normativa desarrollada así como sus principales resultados macroeconómicos fiscales⁴¹; interesa fijarse en uno de los capítulos menos conocidos –a grandes rasgos– de esta primera etapa reformista socialista. Nos referimos, en concreto, a la *frustrada* como *vetada* propuesta de reforma fiscal que impulsaría Jordi Víctor Sevilla, a la sazón Secretario de Estado de Hacienda entre 1982 hasta su destitución fulminante en 1984. Una propuesta sobre que venía trabajando el citado economista de forma interrumpida desde tiempos de Francisco Fernández Ordóñez en Hacienda⁴². Y decimos que es relevante ya que constituye uno de los ejemplos más definidos de esa *falta* de voluntad política cohibida, en lo básico, por las presiones de las clases dominantes. Todo ello con una nota añadida también relevante: el *silencio* y/o la *omisión* de tal episodio por buena parte de los implicados.

Como también se ha advertido el año 1983, en buena parte, se convertiría en un tiempo de transición y de asentamiento para el equipo económico del Ejecutivo socialista, mientras que el siguiente año sería cuando ya de forma continuada se pondrían en marcha su proyecto

³⁷ De nuevo, nos remitimos, a lo apuntado en la *nota* 36.

³⁸ GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, p. 114.

³⁹ Ley 44/1978, de 8 de septiembre, *del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* [B.O.E. 11 de septiembre de 1978]; y, Real Decreto-Ley 5/1981, de 13 de marzo, *por el que se deja en suspenso la publicación de las bases y cuotas declaradas e ingresadas por los Impuestos sobre la Renta y Patrimonio de las Personas Físicas* [B.O.E. 31 de marzo de 1981]. Consúltese, de nuevo, el trabajo de, BRAÑA PINO, Francisco Javier, “El sistema tributario español...”, *op.cit.*. Y asimismo, Noticia, “Calvo Sotelo anuncia en Vitoria que no serán publicadas las listas de Hacienda”, *El País*, 22 de enero de 1981; Noticia, “Hacienda estudia la sustitución de la lista de contribuyentes por la de defraudadores fiscales”, *El País*, 23 de enero de 1981; y, Noticia, Bonifacio de la Cuadra, “El Congreso aprueba el decreto-ley por el que se suspende la publicación de las listas de Hacienda”, *El País*, 29 de abril de 1981. Una noticia en donde se resaltaba las fuertes protestas por parte de la izquierda frente al acuerdo que se alcanzaría con los votos de UCD, CD, PNV, Minoría Catalana y el diputado del Grupo Mixto Pi y Suñer.

⁴⁰ Nos remitimos aquí al apartado “4.4. «Por el cambio»: el punto de no retorno (1981-1982)”.

⁴¹ De nuevo, consúltese el “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

⁴² José Víctor Sevilla (Valencia, 1941). Licenciado y doctor en Ciencias Económicas, en 1966 aprobaría un concurso oposición, con plaza como Inspector Financiero y Tributario del Estado. Tras haber sido profesor de Hacienda Pública en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y más tarde en la UNED, sería nombrado Subdirector de Estudios y Programación de la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA). En tiempos de Francisco Fernández Ordóñez como Ministro de Hacienda (julio 1977-abril 1979) sería nombrado Director General de Tributos y estaría detrás de la redacción de la reforma fiscal acometida entre 1977 y 1978. Tras la llegada de los socialistas sería nombrado Secretario de Estado de Hacienda hasta su salida en febrero de 1984. El citado economista es autor de un amplio conjunto de obras. Además de las ya destacadas: SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política...*, *op.cit.*; id. *El declive de...*, *op.cit.*; véanse igualmente: id., *Flexibilidad impositiva: un análisis económico del sistema fiscal español*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1976, con prólogo de Enrique Fuentes Quintana; y, id. *Política y técnicas tributarias*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales [2004].

económico global. De esta forma, pasaría casi un año hasta que se comenzara a concretar la puesta de un plan de reforma fiscal tantas veces anunciado. En cualquier caso, y bajo la égida de la lucha contra el *fraude fiscal*, en el propio año 1983 se darían pequeños pasos en esta misma dirección. Si en julio de 1983 se anunciaba como el número de inspectores de Hacienda aumentaba un 20%, en noviembre Luis López Ibáñez –Director General de Inspección Financiera– declaraba como 1.000 subinspectores y 200 inspectores se dedicarían a la noble tarea de perseguir el extendido fraude fiscal, con el objeto de reducir en un plazo de tres meses entre el 5% al 10% el mismo⁴³.

La relativa tranquilidad y tiempos de planificación que se tomarían desde Economía y Hacienda, tocaría a su final para principios de 1984. Llegaba la hora de la *verdad*. La primera mitad del aquel mismo año sería movida, tal y como se puede seguir por la prensa –en nuestro caso, a través de *El País*– principalmente. Antes de terminar 1983, lo que conoció coloquialmente como la *campana fin de año* conllevaría –como previamente se había avisado– a poner “varios miles de inspectores y subinspectores enviados a la calle por Hacienda”. Objetivo, localizar a “dos millones de personas que Hacienda estima serán también sus *clientes*”. A ello se juntaban otros “dos millones de personas que todavía no han presentado la declaración”. En concreto, se apuntaba a los principales sospechosos: “pequeños empresarios, agricultores y profesionales”. López Ibáñez junto con José V. Sevilla se pondrían manos a la obra, en una coyuntura en que los medios humanos eran escasos y las posibilidades informáticas limitadas. No más de 2.200 personas estaban en plantilla –600 subinspectores y 1.600 inspectores–⁴⁴. A ello se sumaba además que la posible y deseada colaboración con Hacienda por parte de los contribuyentes seguía sin desarrollo normativo⁴⁵.

Por estos senderos delineados, los socialistas a principios de aquel decisivo año 1984 parecían dispuestos –y con una clara voluntad política todo sea dicho– a atacar al siempre correoso y huidizo *fraude fiscal*. No obstante, pronto todo se *torcerían* tales designios. El motivo, el *salto* a la prensa de la preparación de un Decreto-Ley por parte del equipo económico más próximo de Boyer, de cara a legalizar parte del abundante *dinero negro* de la economía española. Y no era cualquier *dinero negro*, sino el procedente de una parte muy concreta del país: a saber el de aquellos que hubieran comprado pagarés del Tesoro, quienes quedarían exentos del 15% de retención en la próxima declaración del IRPF. No sólo, pues bajo la *consigna* de evitar la salida de capital privado, también se preveía una generosa *amnistía fiscal* en base a aquellos “incrementos patrimoniales sin atender al origen de dichos incrementos y sin repercusión, en el primer año, sobre el impuesto sobre la renta sólo sobre el patrimonio”. Todo ello bajo la “suave” amenaza de un futuro endurecimiento del delito fiscal y de la desaparición del secreto bancario. Medidas, por cierto, que serían duramente criticadas por los “medios bancarios privados”⁴⁶.

Avanzamos. Estamos a finales de enero del ochenta y cuatro. En plena fase de oleada de conflictos obreros y de una cada vez más debilitada posición política desde el Ejecutivo. Las duras críticas tanto desde fuera como desde dentro del Ejecutivo contra tales proyectos

⁴³ Noticia, “El número de inspectores de Hacienda aumenta un 20%”, *El País*, 15 de julio de 1983; Noticia, “Hacienda dedicará 1.000 subinspectores y 200 inspectores a combatir el fraude”, *El País*, 22 de noviembre de 1983.

⁴⁴ Noticia, Gustavo Matías, “En busca de dos millones de contribuyentes perdidos”, *El País*, 24 de noviembre de 1983. Dentro de una serie de reportajes bajo el título, “La inspección fiscal en España”. Sobre el esfuerzo en recursos económicos, informáticos y humanos por parte de Hacienda al respecto, véase también lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 291*.

⁴⁵ Noticia, Gustavo Matías, “El contribuyente de renta está obligado a demostrar lo que ha declarado”, *El País*, 25 de noviembre de 1983. Véase asimismo, Noticia, Gustavo Matías, “Las cajas de pensiones de empresas públicas han empezado a ser auditadas para su integración en la Seguridad Social”, *El País*, 26 de noviembre de 1983.

⁴⁶ Noticia, “El Gobierno proyecta un decreto para legalizar el «dinero negro»”, *El País*, 24 de enero de 1984.

normativos, va a desencadenar la primera de las *crisis* dentro del Ministerio de Economía. Pues mal casaban las llamadas a la *moralización* y la lucha contra el *fraude fiscal* frente al proyecto de una amplia *amnistía fiscal* –que incluía el anonimato para el defraudador– para el capital en lo más duro de la crisis económica.

El resultado final de aquella *crisis* sería la destitución *nocturna y por sorpresa* –tal y como informaría la prensa– de Jordi V. Sevilla, al negarse a transigir con la propuesta del equipo de Boyer, previamente avalada por el Banco de España. Para tales lides Josep Borrell –a quien se le presentaría como un “técnico que apenas se ha prodigado en apariciones de signo ideológico”, y por tanto, muy del *gusto* del equipo económico liberal⁴⁷– se haría cargo de la Secretaría de Estado de Hacienda en medio de no pocos movimientos políticos, tanto dentro de la Moncloa como desde el propio Ministerio de Economía⁴⁸.

Ni con la *destitución* de Sevilla y la entrada de Borrell ni el aparente triunfo de Boyer, terminaría aquel primer intento de amnistía fiscal –más tarde vendrían otros tantos, repitiéndose de forma cíclica hasta el presente–. Hasta julio de aquel mismo año, en torno a la mencionada primera propuesta de Decreto-Ley así como en paralelo a la reforma fiscal, las *noticias* y *filtraciones* sobre sus porqués y objetivos no dejarían de sucederse. Tampoco, las *especulaciones* de todo tipo se verían frenadas. Desde el ascenso de categoría de Miguel Boyer en el Banco de España que levantaría más de una suspicacia de posible nepotismo, pasando por los ataques contra la persona de Sevilla –a quien en un boletín informativo de RNE se llegaría a justificar su cese en base “ciertas indiscreciones cometidas [...] al facilitar datos económicos sin el correspondiente permiso”– vaticinaban no pocos *movimientos* y *problemas* de todo tipo en un corto plazo. Por otro lado, y aunque se descartaría que la *salida* del propio Sevilla tuviera algo que ver con los constantes enfrentamientos entre Boyer y Alfonso Guerra, aquello tenía más trasfondo de lo que aparecía o no aparecía en los medios de comunicación⁴⁹. Dicho en otras palabras, no sólo aparecía como una hipótesis razonable sino que se podía afirmar como tal *salida* se podía ligar, a su vez el enfrentamiento entre las dos grandes posiciones dentro del equipo económico –la *liberal*-dura y la *progresista*-liberal–. Sumado al temor de una “eventual *caza de brujas* desencadenada por los partidarios de la actual política económica”⁵⁰.

⁴⁷ Noticia, “Un estrecho colaborador de Boyer”, *El País*, 2 de febrero de 1984.

⁴⁸ Noticia, José Antonio Martínez Soler, “La tensión política en torno al decreto-ley del «dinero negro» provoca una crisis en el equipo económico del Gobierno”, *El País*, 2 de febrero de 1984.

⁴⁹ Noticia, “La minicrisis de Hacienda se anticipó a otros cambios esperados en la Administración”, *El País*, 3 de febrero de 1984. No dejarán nunca de sorprender las memorias del propio Alfonso Guerra, quien apenas alude a tal cuestión en las mismas. De hecho, tan sólo se refiere a todos estos movimientos en clave personal, sin aludir siquiera a la reforma fiscal ni su posterior e intrincado desenlace: «En el Ministerio de Economía y Hacienda había surgido una desavenencia interna de las que son producto de malentendidos personales, roces insignificantes que no alcanzan importancia política. Se resuelven generalmente con la dimisión o el cede de quien ocupa el lugar más débil en la cadena del ministerio. Así ocurrió y no le di una importancia trascendental a pesar de que el sacrificado era un hombre de capacidad e inteligencias probadas. El secretario de Estado de Hacienda, José Sevilla, presentó su dimisión del puesto por dificultades de comunicación. Hasta aquí el suceso, que, aunque desgraciado no llamaba especialmente la atención. Sí la actitud que adoptó el ministro, que resulta difícil de comprender. Se negó de manera rotunda, enérgica, airada a que apareciera en el *Boletín Oficial* ‘el cese a petición propia’, deferencia general para no perjudicar la proyección profesional del afectado. Y aún sostenía casi con fiereza que se opondría tajantemente a que ningún otro departamento pudiera ‘recolocarle’. Aprecié, con gran incomodidad, una suerte de ceguera de la soberbia. No era ese el estilo habitual en el Gobierno. Aquel día algo se rompió en las normas de las relaciones personas y políticas entre nosotros». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., p. 155.

⁵⁰ Noticia, José Antonio Martínez Soler, “Por qué Sevilla perdió su silla”, *El País*, 5 de febrero de 1984. Por otro lado, la *cruza de brujas* en breve iba a conllevar a una *reestructuración* de los principales altos cargos de Hacienda: Noticia, Gustavo Matías, “El Gobierno estudia una profunda reestructuración orgánica en Hacienda”, *El País*, 8 de febrero de 1984. Asimismo resulta del todo esclarecedor el intento de ‘tapar’ la citada crisis a través de las páginas de *El Socialista*, en donde se negaría *oficialmente* que

La primera consecuencia de calado de aquella crisis sería la paralización de la campaña diseñada por el equipo de Sevilla contra el fraude fiscal⁵¹. De esta forma, entre marzo a junio de 1984, en la práctica se optaría por revisar todos los aspectos de aquel proyecto de reforma fiscal. Eso sí, no faltarían de cara al público los anuncios, más o menos grandilocuentes, con los que recuperar, en cierta parte, la agenda política y superar la dañada imagen tras la que se calificaría, sencillamente, como una “minicrisis”. Así, por ejemplo, a mediados de marzo, Borrell anunciaba la reforma de la Ley 50/1977, *sobre medidas urgentes de reforma fiscal*⁵², y el nuevo Secretario General de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco afirmaría que se habían detectado *deudas tributarias* por valor de 11.000 millones de pesetas, en un gesto político de que lucha contra el fraude no se había frenado⁵³. No faltarían tampoco los anuncios progresistas de cara a la galería por parte de Borrell en los siguientes meses⁵⁴. Todo ello en un contexto en que daba inicio una nueva campaña de la Agencia Tributaria, y medios tan poco sospechosos de no ser afines a las tesis del Ejecutivo hablaban de un sistema fiscal “tercermundista”, ante la constatada realidad de una baja presión fiscal y un extendido fraude fiscal⁵⁵.

A lo largo de los meses de junio y de julio, por fin, se pondría punto y final a la primera reforma fiscal de la época socialista. Por un lado, se continuaría con el *lavado de imagen* por parte del Ministerio de Economía, anunciando un endurecimiento de penas contra el delito fiscal, aunque por el momento sin concretar mayores detalles. Un *endurecimiento* no radical teniendo presente la anterior legislación. Asimismo se conocería como desde 1977 de los 385 expedientes abiertos, tan sólo había habido 32 sentencias, “todas absolutorias excepto una

existiera cualquier tipo de «tensión política» a la par que se reclamaba la «necesidad de máxima coherencia en el equipo económico». ÁLVAREZ, Luis, “Remodelación en economía”, *El Socialista*, nº 348, (1984), pp. 27-28.

⁵¹ Noticia, Gustavo Matías, “Los relevos en el Ministerio de Hacienda paralizan los planes de lucha contra el fraude fiscal elaborados por José Sevilla”, *El País*, 29 de febrero de 1984.

⁵² Véase, primero, Ley 50/1977, de 14 de noviembre, *medidas fiscales urgentes de reforma fiscal* [B.O.E. 16 de noviembre de 1977]. Consúltese aquí el artículo 319 del Código Penal dentro del Capítulo VI del Título III del Libro Segundo del texto primitivo como consecuencia de la modificación de la consideración del ‘delito fiscal’, en base a los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, *medidas fiscales urgentes de reforma fiscal* [B.O.E. 16 de noviembre de 1977]. En el primer y más importante de los artículos citados se podía leer: «El capítulo VI del título III del libro II del Código Penal se titulará en lo sucesivo ‘Del delito fiscal’. El artículo trescientos diecinueve de dicho Cuerpo legal quedará redactado de la siguiente forma: ‘Uno. Cometerá delito fiscal el que defraude a la Hacienda estatal o local mediante la elusión del pago de impuestos o el disfrute ilícito de beneficios fiscales en una cantidad igual o superior a dos millones de pesetas. Se entiende que existe ánimo de defraudar en el caso de falsedades o anomalías sustanciales en la contabilidad y en el de negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración tributaria. El que cometiere delito fiscal será castigado en todo caso con multa del tanto al séxtuplo de la suma defraudada y, además, con arresto mayor si la cantidad estuviese entre cinco y diez millones y con prisión menor para más de diez millones, siempre que la cantidad defraudada exceda de la décima parte de la cuota procedente’». Junto con lo apuntado en la *nota 301* en el Capítulo 6, consúltese, además, el análisis del Inspector Financiero y Tributario, LÓPEZ GETA, José M., “La contabilidad y el delito fiscal: responsabilidades personales”, *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, vol. IX, nº 38-39, (1982), pp. 371-386. Más extensamente, NOREÑA SALTO, José Ramón, *El delito fiscal*, Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid, 1981. Por último, véase la primera normativa al respecto en tiempos ya socialistas en, Real Decreto-Ley, 24/1982, de 29 de diciembre, *de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y Tributaria*.

⁵³ Noticia, Carlos Gómez, “El secretario de Estado de Hacienda anuncia la «reforma» de la Reforma Fiscal de 1977”, *El País*, 16 de marzo de 1984. Véase asimismo, Editorial, “El delito fiscal”, *El País*, 2 de abril de 1984.

⁵⁴ Noticia, “«En este país sólo pagan impuestos los asalariados», afirma José Borrell”, *El País*, 1 de mayo de 1985.

⁵⁵ Editorial, “Hacienda no somos todos”, *El País*, 1 de mayo de 1984.

considerada «casi un error» por parte del Ministerio de Hacienda”⁵⁶. Mientras tanto, por otro lado, no dejarían de sucederse noticias relacionadas con más que probable amnistía fiscal de la banca –calculada en torno a los entonces 50.000 millones de pesetas–⁵⁷ así como la redacción final del Decreto-Ley para el *lavado* del “dinero negro”.

Un nuevo escándalo a mediados de junio sacudiría, de nuevo, la imagen del Gobierno socialista, y por extensión del *socialismo español*, en relación a su pretendida voluntad fiscal moralizante. El lunes 16 de junio de 1984, se conocía por *El País* como el *nuevo* proyecto de reforma fiscal redactado por Borrell y su equipo –y que en aquella ocasión había contado con el apoyo del propio Boyer– presentado el 30 de mayo en un Consejo de Ministros, sería vetado por el Presidente del Gobierno. “[M]urió a los postres de una cena de Felipe González con tres banqueros, celebrada el pasado día 5 [de junio de 1984] en la Moncloa”. Y así señalaba como el “tercer proyecto de ley, corregido ya por la banca y que no se parece en nada a los anteriores, ha desencadenado fuertes tensiones políticas entre altos funcionarios de Hacienda y miembros del PSOE”.

Resultaría así que tras tantos meses de *idas y venidas* todo se *resolvería* en una cena en el Palacio de la Moncloa entre González y Boyer, y por otro lado, Alfonso Escámez (Banco Central), Pablo Garnica (Banesto) y el siempre poderoso Rafael Termes (presidente de la Asociación Española de Banca. Una cena precedida por otra reunión celebrada ese mismo día 5 de junio por los conocidos como los *siete grandes*⁵⁸. Por estas intrincadas vías conspiratorias, resultaba que el proyecto final de Decreto Ley, “responde bastante fielmente a la página 44 y siguientes del informe que Rafael Termes presentó ante la asamblea anual de la Asociación Española de Banca (AEB) el pasado 26 de marzo”.

Miguel Boyer quien parecía haber salido triunfante de la primera batalla, se veía *condenado* a asumir los dictámenes del propio Presidente. El entonces Ministro de Economía optaría por evitar el *queme* al telefonar aquella misma noche al “viceministro de Hacienda para comunicarle los cambios que, no él, sino el presidente del Gobierno ordenaba hacer en el proyecto de ley”. Una futura ley que cambiaba todo para que nada cambiara⁵⁹.

No faltarían las oportunas como las complicadas justificaciones posteriores a un proyecto de ley descafeinado y sometido al escrutinio de los grandes poderes financieros⁶⁰. En paralelo la reforma del Código Penal contra el fraude fiscal iniciaba su lento caminar

⁵⁶ Noticia, Gustavo Matías, “El Gobierno endurece las penas contra el delito fiscal”, *El País*, 8 de junio de 1984.

⁵⁷ Noticia, Gustavo Matías, “El Ministerio de Hacienda, dispuesto a olvidar gran parte de los 50.000 millones de presunta deuda fiscal de la banca”, *El País*, 6 de abril de 1984.

⁵⁸ Junto con los amplios ejemplos de su poder de influencia que se puede encontrar en, CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, *op.cit.*; y, GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, véase, el siempre parcial testimonio de, TERMES, Rafael, *Desde la banca...*, *op.cit.*

⁵⁹ Noticia, Juan Antonio Martínez Soler, “El proyecto de ley sobre «dinero negro», corregido por la banca, desencadena tensiones en Hacienda y en el PSOE”, *El País*, 17 de junio de 1984. Véase tiempo más tarde el artículo de, SARTORIUS, Nicolás, “Lo que dicen y lo que hacen”, *El País*, 21 de julio de 1984. Y por último, consúltase: Ley 10/1985, de 26 de abril, de *modificación parcial de la Ley General Tributaria* [B.O.E. 27 de abril de 1985]; Ley 14/1985, de 29 de mayo, de *Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros* [B.O.E. 30 de mayo de 1985]; y Ley 48/1985, de 27 de diciembre, de *Reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* [B.O.E. 30 de diciembre de 1985]. Y en los noventa, Ley 19/1991, de 6 de junio, de *Impuesto sobre el Patrimonio* [B.O.E. 7 de junio de 1991]. Por último, véanse tres trabajos lo suficientemente explicativos para no extendernos más: FUENTES QUINTANA, Enrique, *Las reformas tributarias...*, *op.cit.*; ALBIÑANA, César, *Sistema tributario español y comparado*, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1992; y, el ya citado trabajo de, BRAÑA PINO, Francisco Javier, “El sistema tributario...”, *op.cit.*

⁶⁰ En este sentido resulta más que ilustrativo, BORRELL, José, “La nueva tributación de los activos financieros”, *El País*, 11 de julio de 1984.

parlamentario⁶¹, para concluir finalmente en la Ley Orgánica 2/1985, de 19 de abril, de *Reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública*⁶².

La historia, en buena parte, se repetía. Si antes de entrar en el Ejecutivo los socialistas habían solicitado el aval y la colaboración de la CEOE, ahora quedaba demostrado no pocos límites franqueables de la voluntad política del Gobierno socialista, como los estrechos márgenes de actuación en el momento preciso en que se había optado por cuestionar –siempre de forma parcial– las estructuras de poder económico. Y con ello se daba un *paso* hacia atrás en la lucha contra el fraude fiscal, cuya problemática sigue persistiendo hasta el día de hoy. ¿Una ocasión histórica perdida?

Los resultados globales de esta política fiscal en este tiempo serán bastante modestos. Los prácticamente cuatro puntos porcentuales –se llegaría un 36,1% de presión fiscal sobre el PIB en 1986– que se ganan en estos años en relación a los ingresos totales de la Administración son el fruto de un ingente esfuerzo político y de medios, que, a pesar de no combatir frontalmente el fraude fiscal, permite al Gobierno tomar un ligero respiro⁶³.

A la hora de calibrar esta política, si una característica la define será la progresividad al elevar el tipo impositivo marginal más alto del 42% al 60%, mientras que se van a reducir en cuatro puntos los de las rentas medias/bajas, es decir, aquellos contribuyentes que declaraban menos de un millón de pesetas⁶⁴. Con todo, este esfuerzo fiscal en la primera legislatura será, insistimos, insuficientes en tanto “los gastos públicos tuvieron un crecimiento muy superior a la de los ingresos”. De este modo, el “déficit presupuestario que ascendía al 0,3% del PIB en 1976, paso al 2,5 del PIB en 1980 y al 6,9% en 1985”⁶⁵.

⁶¹ Véase el completo *dossier* que se elaboró de cara a la reforma fiscal de mediados de los años ochenta: CORTES GENERALES. CONGRESO DE DIPUTADOS, *Fraude fiscal* (documentación preparada para la tramitación de los Proyectos de Ley: Represión del Fraude fiscal) [BOCG Congreso, 7 septiembre 1984], *Reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública* [BOCG Congreso, 11 de septiembre de 1984], Madrid, Secretaria General / Centro de Estudios y Documentación / Congreso de los Diputados, 1984.

⁶² Ley Orgánica 2/1985, de 29 de abril, de *Reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública* [B.O.E. 30 de abril de 1985]. Sígase aquí lo dicho en uno de los manuales de referencia, FUENTES BARDAJÍ, Joaquín (dir.), *Manual de delitos contra la Hacienda Pública*, Navarra, Thomson Aranzadi, 2008. Y más cercano al tiempo de la aprobación de tan importante normativa: QUEROL GARCÍA, M^a Teresa, *Cuestiones procesales en la nueva regulación de los delitos contra la Hacienda Pública*, Madrid, Información y Documentación Tributaria, 1987; y, MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel, *Delitos e infracciones tributarias: teoría y práctica*, Valladolid, Lex Nova, 1991.

⁶³ Junto con la bibliografía anteriormente aportada consúltase el interesante trabajo de, LÓPEZ PINA, Antonio, BARNES, Samuel H. y Mc DONOUGH, Peter, *Bases sociales de la política económica y fiscal de España*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1986.

⁶⁴ Datos extraídos de, BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, pp. 165-166. Por lo demás, una visión de conjunto en ALBI IBÁÑEZ, Emilio, “La reforma fiscal” en id. (coord.), *La Hacienda Pública...*, *op.cit.*, pp. 27-54.

⁶⁵ FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, p. 46. Y añadían los autores: «Lo más preocupante era que el déficit se iba autoalimentando como consecuencia de la refinanciación del servicio de la deuda (amortiguación del principal y pago de intereses) y sólo una pequeña parte procedía del incremento de los gastos». *Ibidem*. Por su parte, como señalaría Emilio de la Fuente: «El esfuerzo fiscal en este país es prácticamente nulo. Los inspectores de hacienda están desesperados porque están desorientados, porque les mandan hacer las inspecciones donde no deben hacerlas, etc.». FUENTE, Emilio de la, “Las etapas de la política económica del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 91.

La combinación y extensión de las políticas de ajuste contenidas en el primer *Programa Económico a Medio Plazo*, orientadas en lo básico a reducir la inflación y el déficit público, junto con la política de liberalización, van a conllevar asimismo –como igualmente se ha advertido– un endurecimiento de la política monetaria con el objetivo de contener tanto la inflación como la demanda interna. Resultado de ello será que “el tipo de interés real se elevó así del 2,4 por 100 en 1982 al 8,4 por 100 en 1985”⁶⁶. Por este camino, “los objetivos monetarios se continuaron fijando de acuerdo con la inflación y las tasas de crecimiento real previstas por el gobierno en sus planes presupuestarios”⁶⁷. Quedaba suficientemente claro el “rostro monetario” –o como lo denominara Carlos Rodríguez Braun el “monetarismo socialista español”⁶⁸ – que adquirirían, en adelante, las políticas socialistas con el permanente beneplácito del Banco de España⁶⁹.

Políticas que, en concreto, van a tener su profundización a través de la aprobación de los PGE durante esta primera etapa⁷⁰. Solventado de antemano el posible desgaste del trámite parlamentario, al tener una mayoría parlamentaria garantizada en ambas cámaras, el Gobierno tras aprobar Ley 9/1983, de 13 de julio, de *Presupuestos Generales del Estado para 1983*⁷¹, rápidamente se concentraría en los presupuestos del año siguiente, en donde entonces se

⁶⁶ BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, op.cit., p. 89. En este sentido, consúltese el trabajo de, ROJO, Luis Ángel, “La política monetaria en un proceso de «ajuste positivo»”, *Papeles de Economía Española*, nº 15, (1983), pp. 172-174. Una política que, no obstante, ha salido calificada, entre otros adjetivos empleados, de *cautelosa, parcial y moderada*. BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, op.cit., pp. 151-152. Más reflexiones al respecto en esta línea en, SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, op.cit., pp. 109-124.

⁶⁷ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, op.cit., p. 153. E igualmente, DEHESA, Guillermo de la, “Ajuste externo y tipo de cambio”, *Papeles de Economía Española*, nº 15, (1983), pp. 282-304; y del mismo autor, id., “Balanza de pagos y tipos de cambio de la peseta”, *Economistas*, vol. III, nº 17, (1985), pp. 25-30, dentro del dossier monográfico, *España 1985: un balance*.

⁶⁸ RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “De la agonía a la agonía” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, op.cit., 53.

⁶⁹ FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit., p. 42. Al respecto resulta enormemente ilustrador los trabajos contenidos en, BANCO DE ESPAÑA, *Política monetaria: El punto de vista del Banco de España*, Barcelona, Orbis, 1986; y un año después, ARGANDOÑA RAMÍZ, Antonio, *Ensayos sobre política monetaria española*, Barcelona, Orbis, 1987.

⁷⁰ La bibliografía básica para el examen de esta vital cuestión es la siguiente –aunque a lo largo de las siguientes páginas se emplearán otros tantos trabajos–: ZAPICO GOÑI, Eduardo, *La modernización simbólica del presupuesto público (análisis de la reforma presupuestaria del gobierno socialista)*, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública / Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 1989; JUAN ASENJO, Óscar de, *Introducción a la hacienda pública y la política económica*, Barcelona, PPU, 1989; NAVARRO PASCUAL, Reyes, *El presupuesto y la estabilidad económica en la democracia española*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2007; RUÍZ TARRÍAS, Susana, *Los presupuestos generales del Estado en las relaciones entre Gobierno y las Cortes Generales*, Pamplona, Thomson Civitas, 2007; HERRERO SUAZO, Santiago, QUEROL BELLIDO, Vicente y SÁNCHEZ REVENGA, Jaime, *Veinticinco años de historia presupuestaria*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2007 [CD-ROM]; RUIZ ALMENDRAL, Violeta, *Estabilidad presupuestaria y gasto público en España*, Madrid, La Ley, 2008; BRAÑA, Francisco Javier, “Los Presupuestos Generales del Estado”, *Documento de Trabajo de Economía Aplicada*, nº 1, (2010). Y asimismo véase a nivel estadístico, “Información estadística sobre la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 1979-1991”, *Revista de las Cortes Generales*, nº 24, (1991), pp. 377-386; y a nivel político-institucional los correspondientes números de las revistas *Hacienda Pública Española* y *Presupuesto y Gasto Público* editadas ambas por el Ministerio de Hacienda. Por lo demás, revítese lo apuntado en el Capítulo 6, nota 151.

⁷¹ Ley 9/1983, de 13 de julio, de *Presupuestos Generales del Estado para 1983* [B.O.E. 14 de julio de 1983]. Una normativa que no llevaba en aquella ocasión la correspondiente *Exposición de Motivos*.

visualiza de forma clara el nuevo modelo económico por el que se apuesta⁷². Así pues, quedan limitadas a través de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, *de Presupuestos Generales del Estado para 1984*, las principales líneas de actuación macroeconómica en adelante⁷³.

Bajo la consigna de realizar un “presupuesto por objetivos” como se declara en su misma *Exposición de Motivos* –y que viene a refutar la técnica ya expuesta en el *Programa Económico a Medio Plazo*⁷⁴– se presentan toda una batería de medidas diseñadas en base a los tres grandes objetivos guiados por la égida de una “disciplina presupuestaria en términos taxativos”⁷⁵: primero, “una reducción del déficit público equivalente a medio punto del producto interior bruto”. Un objetivo “moderado” que se mantendrá hasta 1987, cuando a partir de entonces se acometerá más profundamente políticas en esta dirección. En todo caso, esta orientación presupuestaria conllevaría durante los dos primeros años una reducción de la “inversión en capital fijo hasta casi el 2,5% en 1983 y 7% en 1984”⁷⁶; segundo, la limitación del gasto público “al 6,50 por 100”, a lo que se suma “una congelación, en términos reales, de las compras de bienes y servicios y una moderada progresión de las inversiones reales”. Lo que, a la postre, venía a confirmar el rechazo explícito de medidas contra-cíclicas; y tercero, “una política fiscal que conllevará una minoración relativa a los ingresos de la Seguridad Social, tendente a abaratar el coste de la mano de obra con objeto de estimular el empleo” con la contrapartida de una “decidida lucha contra el fraude y consiguiente mejora de la carga tributaria” en base a “variaciones en los tipos impositivos que afectan de forma moderada a las rentas más elevadas y a la imposición sobre el consumo”, según se explicaba nuevamente en la *Exposición de Motivos*. En resumen, una política de ajuste ortodoxo en busca de la racionalidad económica que, no obstante, estaba encaminada a realizar “un importantísimo esfuerzo de solidaridad, especialmente dirigido hacia aquellos colectivos que con mayor dureza están sufriendo los efectos de la crisis”⁷⁷.

Estas mismas orientaciones presupuestarias –control del déficit público y de la inflación, control del gasto social y una nueva política fiscal– se van a mantener en lo fundamental en los siguientes años –véase, Ley 50/1984, de 30 de diciembre, *de Presupuestos*

⁷² QUEROL BELLIDO, Vicente, “Hacia un nuevo modelo presupuestario: Los Presupuestos Generales del Estado para 1984”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 18, (1993), pp. 133-150.

⁷³ En primer término consúltese la intervención de Miguel Boyer el 27 de octubre de 1983 en la citada presentación de los PGE: CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, *Del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984*, II Legislatura, nº 67, 27 de octubre de 1983, núm. 57-I, Serie A, pp. 3090-3099. BOYER, Miguel, “Presentación ante el pleno del Congreso de Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984”, *Hacienda Pública Española*, nº 85, (1984). Y asimismo consúltese los argumentos ofrecidos meses antes por el propio Ministro en, id, “Características de los presupuestos generales del Estado para 1984”, *Hacienda Pública Española*, nº 83, (1984), pp. 129-144. Y años más tarde, id., “El segundo ajuste económico de la democracia (diciembre de 1982 a julio de 1985)” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, op.cit., vol. VIII, pp. 239-304. Y por último, BORRELL, José, “Los presupuestos del Estado para 1984: Objetivos y estructura”, *Hacienda Pública Española*, nº 85, (1984), pp. 51-59.

⁷⁴ Véase aquí, SEBASTIÁN GASCÓN, Carlos, “Los presupuestos del Estado para 1984 en el contexto del Programa Económico a medio plazo”, *Hacienda Pública Española*, nº 85, (1983), pp. 61-69.

⁷⁵ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, op.cit., pp. 153-154, nota 15. Para una visión global sobre este asunto, GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel, “Disciplina presupuestaria, estabilidad macroeconómica y eficiencia de las finanzas públicas” *Papeles de Economía Española*, vol. II, nº 100, (2004), pp. 17-31, dentro del dossier monográfico, *25 años de Información Económica*.

⁷⁶ FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit., p. 43.

⁷⁷ Todos los anteriores entrecomillados proceden de la *Exposición de Motivos* de, Ley 44/1983, de 28 de diciembre, *de Presupuestos Generales del Estado para 1984* [B.O.E. 30 de diciembre de 1983].

*Generales del Estado para 1985*⁷⁸ – a pesar de la mejora que comienza a percibirse en la economía española.

Sin embargo, el acontecimiento económico-jurídico más importante de mil novecientos ochenta y cinco en el campo económico, sin minusvalorar lógicamente el papel que jugarían los citados PGE, sería la aprobación del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, *sobre Medidas de Política Económica*⁷⁹. La última “gran” aportación de Miguel Boyer al frente de la cartera del Ministerio de Economía y Hacienda. A pesar de que existe una amplia literatura, tanto sobre su contenido jurídico como en torno a sus consecuencias macroeconómicas, los manuales al uso así como no pocos acercamientos a esta época no le han concedido –a nuestro juicio– la transcendencia que tendrá tal medida a medio plazo en el afianzamiento del rumbo económico diseñado⁸⁰.

Ha transcurrido poco más de un año desde que se pusiera en marcha el *Programa Económico a Medio Plazo*. Todo ello con resultados desiguales –como veremos a continuación– sobre todo en materia de demanda interna y empleo. El análisis que se efectúa entonces por parte del Ministerio de Economía, una vez más con el beneplácito de la Presidencia del Gobierno⁸¹, es sencillo y se encuadra dentro del consenso académico liberal: las medidas puestas en marcha todavía no son lo suficiente amplia, ni consistentes en un sentido liberalizador de la economía, que permitan recuperar las dos variables recién señaladas y, por tanto, restablecer los siempre buscados equilibrios macroeconómicos.

De este modo, se constata que el esquema de recuperación propuesto –dentro del “ajuste positivo” con la *coletilla* de *solidario* de los gobiernos socialistas– se encuentra cortocircuitado por las insuficiencias y obstáculos derivados, tanto de las medidas adoptadas como de la compleja realidad socioeconómica en donde se insertan. Por tanto, “se hace evidente la necesidad de adoptar más medidas en el sentido de potenciar la demanda interna”⁸², de cara a

⁷⁸ Ley 50/1984, de 30 de diciembre, *de Presupuestos Generales del Estado para 1985* [B.O.E. 31 de diciembre de 1984]. Véase además la intervención de Miguel Boyer el 6 de noviembre de 1984 en la presentación de aquellos *Presupuestos Generales*: BOYER, Miguel, “Presentación ante el pleno del Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 1985”, *Hacienda Pública Española*, nº 90, (1984), pp. 21-56. Y así como el trabajo en ese mismo número de, BORRELL, Josep, “Aspectos estructurales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985” (pp. 57-70).

⁷⁹ Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, *sobre Medidas de Política Económica* [B.O.E. 9 de mayo de 1985]; Resolución de 16 de marzo de 1985, *por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica* [B.O.E. 22 de mayo de 1985]. En torno a cómo se pensó, se desarrolló y se gestionó tal ‘paquete de medidas’ desde las más altas instancias económicas del país, ESTEFANÍA, Joaquín y ARANCIBIA, Samuel, “Los mosqueteros de la «nueva política económica»”, *El País*, 9 de junio de 1985.

⁸⁰ Junto a lo que se irá señalando en páginas posteriores consúltense los dos siguientes trabajos, especialmente enfocados desde el ámbito jurídico: SOPENA GIL, Jordi, “Aspectos fiscales del Real Decreto-Ley 2/1985, sobre Medidas de Política Económica”, *La Ley*, nº 4, (1985), pp. 1056-1062; y, ESTUDIOS SOBRE CONSUMO, “Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, *sobre Medidas de Política Económica*”, *Estudios sobre el Consumo*, nº 6, (1985), pp. 165-172.

⁸¹ Mariano Guindal apunta que la iniciativa partiría del propio Presidente del Gobierno, en un momento de aguda crisis económica, y una situación de debilidad política ante los atentados de ETA, y los «intentos desestabilizadoras de la extrema derecha, como se puso de manifiesto cuando los servicios de inteligencia detectaron y evitaron el golpe previsto para el 2 de junio [de 1985] contra la familia real, un grave suceso que se mantuvo en secreto para no perjudicar el proceso de integración con Europa». En este marco, el «presidente presionó a su ministro de Economía para que hiciera algo que permitiera salvar la situación antes de convocar las elecciones generales de 1986. Tenían un año para cambiar la percepción ciudadana y no quedaba otro camino que aprobar un ‘plan de choque para hacer reaccionar al mercado’». GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, op.cit., p. 260.

⁸² Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, *sobre Medidas de Política Económica en la Exposición de Motivos*.

reducir el peso desequilibrante del exterior⁸³. A partir de ahí se esboza un conocido “paquete de medidas” que va a devenir en clave en el posterior *boom económico*, y, concretamente, en muchas de las características intrínsecas del nuevo modelo productivo.

El que sería conocido como el “decreto Boyer” siempre citado a la hora de referirse a la liberalización de los alquileres y horarios comerciales, iría mucho más allá⁸⁴. Detenernos en el mismo y, en concreto en una serie de cuestiones que en este trabajo nos interesan sobremanera, nos pueden proporcionar un conjunto de *pistas* de enorme valor. De entrada, la *Exposición de Motivos* de aquel Real Decreto-Ley llamado *sobre Medidas de Políticas Económica*, era la más fiel constatación de la profundización del *discurso liberal*, ahora sin ambigüedad ninguna.

«Desde su toma de posesión, el Gobierno de la Nación se ha propuesto sentar las bases para un crecimiento estable y duradero de la economía española como condición necesaria para crear empleo. Dentro de esta estrategia a medio plazo, el Gobierno ha ido adoptando tanto las medidas de política coyuntural como las reformas estructurales necesarias.

Los grandes ejes de la política macroeconómica han sido una política monetaria a la que se han fijado objetivos antiinflacionistas y una política fiscal enfocada a la reducción del déficit público, así como la recomendación a los interlocutores sociales a favor de la moderación en los Convenios Colectivos».

Sin embargo, no eran pocos los éxitos conseguidos hasta el momento según se exponía en el propio RD-L: “[l]as reformas estructurales e institucionales han producido transformaciones tales como la supresión de serios obstáculos a la contratación temporal”, se citaba como ejemplo del avance, en este caso, de la radical flexibilización operada a través de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984. También otro *éxito* a resaltar lo constituía el mantenimiento del “poder adquisitivo de los salarios con el fin de compensar con una mayor demanda interna una previsible desaceleración de la demanda externa”, en alusión directa a los objetivos obtenidos con la firma del AES. Con todo, y tras no más de medio año de haberse

⁸³ La explicación central de esta apuesta la encontramos en Fernando Esteve y Rafael Muñoz: «La política de desregulación laboral y contención de los costes salariales hacía que no se pudiera confiar en el consumo privado como generador de esa demanda efectiva extra que pusiera en marcha el proceso de recuperación; de hecho en el período 1982-87 la tasa de variación del consumo fue del 1,9% por debajo del 2,6% de crecimiento del PIB, produciéndose incluso, en 1984, una caída en el consumo privado en términos reales. Esto significa que la recuperación quedaba en manos del comportamiento del sector exterior, de los empresarios en cuanto a inversores o del sector público. En la medida en que la actuación del sector público en este campo –generación de demanda efectiva– entraría en contradicción con las medidas de liberalización y desregulación promovidas por este sector, y que el comportamiento del sector exterior depende de más variables y de mayor importancia que la relación entre precios nacionales y precios extranjeros, el protagonismo del relanzamiento quedaba en manos de la inversión privada, a la espera de que el aumento de ésta generara la suficiente demanda efectiva como para disminuir de forma efectiva la tasa de desempleo». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, p. 28.

⁸⁴ Como destacaría el propio Charles Powell: «Por su impacto social, la medida más importante adoptada en este terreno fue sin duda el llamado ‘decreto Boyer’ de abril de 1985, que liberalizó los alquileres y los horarios comerciales. En líneas generales, estas reformas pretendieron reducir las regulaciones burocráticas y el papel del Estado, reforzando el papel del mercado en la economía». POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 347. Otros autores calificaron al mismo como el ejemplo de la «más pura flexibilidad». FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit., p. 48. Por lo demás, y en relación a los temas de los horarios comerciales véase, Orden de 31 de julio de 1985, *interpretativa de aplicación del artículo 5.º del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica* [B.O.E. 1 de agosto de 1985]. Por último, véase la opinión personal del tantas veces citado protagonista en, BOYER, Miguel, “El segundo ajuste económico de la democracia española (diciembre de 1982-julio de 1985)” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, op.cit., vol. VIII. Sobre sus efectos en el posterior boom inmobiliario véanse los datos manejados en el apartado “8.2.1. La «obsesión enfermiza»”.

presentado los PGE de 1985⁸⁵, se hacían evidentes no pocas insuficiencias. Como se ha avanzado, se perseguía *potenciar la demanda interna* en un contexto de desaceleración económica internacional.

Sin moverse una coma del esquema liberal de salida se anunciaba:

«Por ello, el Gobierno ha decidido adoptar un conjunto de medidas destinadas a estimular el consumo privado y la inversión, a fomentar el empleo y a impulsar el sector de la construcción.

Por otra parte, la confirmación de la proximidad del ingreso de España en las Comunidades Europeas aconseja acelerar algunas reformas institucionales que permitan, al dotar de una mayor flexibilidad a las empresas españolas, ajustarse a un entorno más competitivo con menores costes sociales».

Cuidar, mimar, proteger a la inversión privada adquiriría fundamento normativo, aun a costa de los consabidos costes sociales pero sobre todo por la vía del coste presupuestario. ¿Cómo y de qué forma se concretaría aquello?”. Pues entre otras medidas las siguientes. En el artículo 1 *Libertad de armonización para las inversiones que comiencen en 1985 y 1986*, en cuyo punto primero se decía: “A estos efectos, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto de Sociedades, serán deducibles las dotaciones practicadas, sin perjuicio del mantenimiento de la amortización mínima establecida en la normativa vigente”. Por su parte, en el artículo 2 *Supresión del límite del 30 por 100 de la cuota en la desgravación por empleo en el Impuesto sobre Sociedades*, se daba un paso más de cara a abaratar el coste de mano de obra a cargo del Estado. Ello a través de una nueva redacción del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1978⁸⁶, que quedaba redactada de la siguiente forma: “5. La deducción por creación de empleo, regulada en el apartado 3 de este artículo, podrá absorberse de la cuota líquida”. Todavía más, generosa se mostraría la Administración al respecto a través del artículo 3. *Desgravación de la inversión de los trabajadores en la propia Empresa*. Estas dos medidas tendría por principal fin la estimulación del consumo privado. De hecho, desde el propio Partido Socialista Obrero Español, en un amplio documento justificativo de la política económica del Ejecutivo socialista, calcularía que dichas medidas supondría una inyección de liquidez de 107.000 millones de pesetas, a pesar de la pérdida de capacidad recaudatoria debida a la disminución de los rendimientos sobre trabajo personal⁸⁷.

⁸⁵ Véase lo apuntado en la *nota* 78.

⁸⁶ Ley 61/1978, de 27 de diciembre, *del Impuesto sobre Sociedades* [B.O.E. 30 de diciembre de 1978]. Para las revisiones de esta normativa así como su capacidad recaudatoria véase el apartado “8. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”, y en concreto *nota* 230 y siguientes.

⁸⁷ Datos procedentes de, AHFPI, PSOE, Secretaria de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, “La política económica de los socialistas: balance de un ajuste solidario”, Madrid, 1986, sig. B 3482, p. 50. Un texto dedicado si no plenamente sí en un gran porcentaje a avalar las medidas contenidas en el citado ‘paquete jurídico’. De hecho, se llegaría a justificar la previsible pérdida de capacidad recaudatoria del Estado de la siguiente forma: «En todo caso, es preciso destacar que los 107.000 millones de pesetas que representa la disminución de los tipos de retención suponen una moderada inyección de liquidez en la economía, calculada para producir una medida de reacción de la demanda interna por esta vía, con el propósito de evitar presiones fuertes sobre el nivel de precios, es decir, no afectando el comportamiento de una de las variables básicas de la política económica del Gobierno». *Ibidem*. Para el economista Emilio de la Fuente estas medidas que venían *dulcificar* las políticas de ajuste emprendidas en años anteriores, se constituyeron en un ejemplo, de nuevo, de las incapacidades a la hora de prever el rumbo de la economía. Así, por ejemplo, a partir de las cifras dadas tanto por parte del PSOE como por parte de diversos periódicos sobre los miles de millones que la Agencia Tributaria dejaría de recibir señalaría el citado autor: «Porque pensar [...] que 130.000 millones de pesetas, que no va a ser esa suma sino que se van a reducir en el impuesto sobre la renta para que vayan a las economías privadas, supone algo así como 0,4% del consumo privado. El consumo privado en este país es el 70% del producto nacional bruto, viene a ser algo así como 20 ó 21 billones de pesetas el consumo privado [...]. Porque reducir además las retenciones del impuesto sobre la renta, ¿a quién le reducen? Le reducen a quien paga impuesto sobre la renta, a la parte media de los salarios. Pero, también discrimina porque reduce a quien paga impuestos sobre la renta, a quien no puede defraudar, porque le hacen las retenciones». FUENTE, Emilio de la, “Las

Asimismo, y tras una serie de artículos destinado a la *reducción de los costes de constitución de Sociedades* –artículo 4– y de la *libertad de horario para los locales comerciales* –artículo 5– y los relacionados con la vivienda y la construcción –artículo 7, artículo 8 y artículo 9– el “decreto Boyer” se constituiría en toda una llamada a la atracción de capitales extranjeros, tal y como se establecía en su artículo 6 *Liberalización de la normativa sobre inversiones extranjeras*: “Quedan derogados los artículos 18 y 25.8 y el párrafo segundo de la disposición adicional tercera del Decreto 3021/1974, de 31 de octubre, por el que se sanciona con fuerza de Ley el texto refundido de las disposiciones legislativas sobre inversiones extranjeras en España”⁸⁸. O dicho con otras palabras, aquellos artículos supondrían la deducción fiscal casi completa en el IRPF así como en el siempre maniatado Impuesto sobre Sociedades, para todas aquellas inversiones nacionales y extranjeras, acompañadas de la contratación de nuevos trabajadores, que tuvieran lugar durante 1985 y 1986. Medidas que tendría su expresión normativa con la publicación el BOE del Real Decreto 1045/1985, de 29 de mayo, *por el que se liberaliza el régimen de autorización de las inversiones extranjeras en España*⁸⁹.

Otras tantas normativas le seguirían a este ímpetu liberalizador-modernizador. Incluso con Boyer ya fuera de Economía aquel Real Decreto-Ley 2/1985 tendría su continuación a los pocos meses. ¿La dirección? La misma aunque todavía más profundizando en el *afán liberal*. Nos referimos al Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, *de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales*, ya con Solchaga asentado en Economía⁹⁰. Otra normativa sobre la que, en términos generales, se ha pasado por alto así como sus sucesivas modificaciones o ampliaciones⁹¹. En aquella ocasión, y ya en una etapa de recuperación económica y por lo tanto sin el argumento/pretexto de la *salida progresista* a la crisis, se justificaría aquel *nuevo giro* ante las exigencias que imponía la entrada en la CEE. Todo ello dentro de la lógica de la *modernización-europeización* nunca cuestionables:

«A partir del 1 de enero de 1986, la economía española se ha visto sustancialmente afectada por nuestra adhesión a las Comunidades Europeas. Esta adhesión provocará, como efectos más destacados, la creciente liberalización de ampliación de mercados y la posibilidad de una mejor asignación de recursos a efectos de generar un incremento del crecimiento y del bienestar. Las oportunidades que la adhesión a las Comunidades abre a nuestra economía deben ser aprovechadas. Por ello, las orientaciones de la política económica deben orientarse a facilitar una respuesta ágil mediante la creación del entorno institucional adecuado desde los primeros momentos de la incorporación.

Con este objetivo, el presente Real Decreto-ley contiene medidas administrativas, fiscales, financieras y laborales tendentes a subvenir las necesidades actuales de nuestra Administración, economía y finanzas, en el continuado esfuerzo de modernización y plena integración en Europa. Necesidad que es, por sí misma y por los fines a que los medios de remediarla sirve, urgente e inmediata, a fin de aprovechar las oportunidades que existen».

Este amplio conjunto de medidas se concentrarían, en lo básico, en la simplificación y eliminación de las trabas administrativas en relación a la creación de nuevas empresas –artículo

etapas de la política económica del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., pp. 85 y 88, respectivamente.

⁸⁸ Decreto 3021/1974, de 31 de octubre, *por el que se sanciona con fuerza de Ley el texto refundido de las disposiciones legislativas sobre Inversiones Extranjeras en España* [B.O.E. 6 de noviembre de 1974].

⁸⁹ Real Decreto 1042/1985, de 29 de mayo, *por el que se liberaliza el régimen de autorización de las inversiones extranjeras en España* [B.O.E. 2 de julio de 1985].

⁹⁰ Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, *de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales* [B.O.E. 26 de marzo de 1986]; Resolución de 8 de abril de 1986, *por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales* [B.O.E. 15 de abril de 1986].

⁹¹ Entre otras: Orden de 6 de octubre de 1986, *por la que se determinan los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo* [B.O.E. 8 de octubre de 1986].

1 y artículo 6-. Puesto a la tarea incluso se daba un paso más allá en tan deseado fin: “el Real Decreto-ley hace una aplicación del silencio administrativo positivo” –artículo 2-. Se avisaba allí también de la futura redacción de los *planes y fondos de pensiones*⁹², así como de una creación de la normativa específica con las *sociedades y fondos de capital-riesgo* –artículo 12– a los que se aseguraba todo tipo de beneficios fiscales⁹³.

En el ámbito del mundo del trabajo, se daría un paso no menor, en ningún caso, en torno al incremento de la discrecionalidad empresarial, a la hora de introducir una mayor flexibilidad en la contratación de nuevos trabajadores y el control de las horas extraordinarias, con modificación del ET incluida. Bajo las mismas bases argumentativas –al menos en el plano discursivo jurídico– aunque manteniendo un no fácil equilibrio entre ambas posiciones –capital y trabajo, respectivamente– se volvían a insistir en los mismos argumentos:

«Las medidas laborales se mueven en la misma línea de facilitar la creación de un entorno institucional adecuado a mejorar las expectativas de crecimiento económica traducidas de empleo».

De esta forma, a partir de la redacción propuesta con el artículo 7, las “empresas podrán contratar directamente cuando lleven a cabo convocatorias públicas para celebrar pruebas objetivas de acceso a las mismas, siempre que transcurran más de tres días desde la convocatoria hasta la celebración de la prueba”. Eliminándose así el requisito de estar inscrito en el INEM 15 días. Lo que conllevaría una modificación del artículo 16.1 del ET⁹⁴ y del artículo 42.1 de la Ley 51/1980⁹⁵. En segundo lugar, y tras anunciar una “importante reducción del número máximo de horas extraordinarias de posible realización en el año, que pasan de 100 a 80, para incrementar así las expectativas de generación de empleo”, resultaba que por el artículo 8 se daba entera libertad a los empresarios para distribuir las a su antojo, según necesidades de actividad, aunque no dejaba de ponerse la *coletilla necesaria*: previa “aceptación voluntaria de los trabajadores”. Estos y otros detalles no menores, conllevaría un incremento del poder de dirección por parte del empresario bajo los argumentos tantas veces consabidos.

⁹² Ley 8/1987, de 7 de junio, *de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones* [B.O.E. 9 de junio de 1987]. La *Exposición de Motivos* no podía ser más clarificadora: «La presente Ley viene a corregir esta ausencia [falta de legislación], institucionalizando una modalidad de ahorro de creciente demanda social con regulación y control por la Administración, con ello incorporada a nuestra realidad una experiencia contrastada positivamente en la mayoría de los países desarrollados, especialmente en las últimas décadas». Normativa desarrollada posteriormente por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, *por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones* [B.O.E. 2 de noviembre de 1988]. En cualquier caso, dicho camino ya se había abierto anteriormente con la publicación de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, *sobre ordenación del seguro privado* [B.O.E. 4 de agosto de 1984], y dándose el *salto* definitivo en esa detectada tendencia ‘privatizadora’ años después con normativas tan importantes como las dos siguientes: Ley 30/1995, de 8 de noviembre, *de ordenación y supervisión de los Seguros Privados* [B.O.E. 9 de noviembre de 1995]; y más concretamente a partir de, Ley 24/1997, de 15 de julio, *de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social* [B.O.E. 16 de julio de 1997]. De hecho, la ‘compra’ de pensiones privadas se convertiría en un ‘producto’ cada vez más demandado por un amplio espectro de las capas asalariadas. De esta forma ya en 1990 los fondos privados de pensiones representaban el 1% del PIB y en la actualidad cerca del 8%. Datos estos procedentes de, BASTERRA, Juanjo, “Las reformas de pensiones desde 1985 han recortado derechos y prestaciones”, *Gara*, 3 de enero de 2011.

⁹³ Véase, primero, Ley 46/1984, de 26 de diciembre, *reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva* [B.O.E. 27 de diciembre de 1984]; Real Decreto 1346/1985, de 17 de julio, *por la que se reglamenta la Ley 46/1984, de 26 de diciembre reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva* [B.O.E. 3 de agosto de 1985]; y, Orden de 26 de septiembre de 1986, *por la que se regula el acceso al Registro Administrativo de Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo* [B.O.E. 4 de octubre de 1986]

⁹⁴ Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

⁹⁵ Ley 51/1980, de 8 de octubre, *Básica de Empleo* [B.O.E. 17 de octubre de 1980]. Sobre todas estas cuestiones se volverá con detenimiento en el Capítulo “9. En nombre de la «modernización»: *el mandato de la flexibilidad* (octubre 1976-febrero 1983)”.

Pero volviendo ahora a los orígenes y contexto en donde se aprueba y se desarrolla el “decreto Boyer” este *paquete medidas* se publicaría en el BOE a un escaso mes de la convocatoria de la huelga general de 1985, la primera de otras tantas durante la época socialista. Todo ello en un escenario político de cierta inestabilidad y de cuestionamiento de la estrategia económica socialista, incluso por parte de su aliado natural, la UGT⁹⁶. A partir de la breve lectura que se ha realizado sobre algunos de sus principales objetivos, nos encontramos, en suma, ante una profundización de la política económica sustentada tanto en los PEG como en el propio PEMP.

Medidas que se insertan, por lo demás, en el esquema de recuperación inicial aunque con una intensidad no prevista en un primer momento, ante la constatación de que la *salida a la crisis* diseñada, no ofrece los resultados previstos en el tiempo esperado. Un amplio paquete legislativo que, no obstante, sería duramente cuestionado tanto por las fuerzas políticas opositoras, sindicales y sociales del país⁹⁷. Por su parte, tanto desde el Gobierno como desde el PSOE se argumentaría que tal *paquete* no significa “modificación o cambio en la política general del Gobierno” ya que se trataba de una *acción coyuntural*, que no alteraba en sentido alguno el plan adoptado para la salida de la crisis⁹⁸. Ahora bien, visto con el paso del tiempo, si bien se puede afirmar que no se produciría modificación sustancial de las líneas fundamentales de la política económica del Gobierno, aquel conjunto de *medidas coyunturales* vendrían a suponer un paso más en el afianzamiento del único camino posible, de la “única política posible”, cerrando, en definitiva, la posibilidad de ensayar otras alternativas en adelante. Sus importantes resultados económicos –a corto y medio plazo– justificarían políticamente aquel nuevo giro, como se encargaría de publicitar, por enésima vez, la organización socialista⁹⁹.

⁹⁶ «Han sido muy diversas y amplias, algunas han merecido nuestra repulsa (horarios comerciales), otras nuestro escepticismo y duda (arrendamientos, nuevas ayudas a la contratación, desgravación fiscal), otras nuestro apoyo (reducción de burocracia, mayor competencia en el sistema financiero) y otras nuestra aprobación al ver recogidas posturas que hemos defendido: relanzamiento la demanda interna a través de las rentas más bajas». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al IV Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 28 y 29 de junio de 1984, sig. 002606-003, p. 10. Téngase presente que un año antes desde la UGT se declararía: «Desde la U.G.T. creemos en que este es un buen camino [la política económica socialista] para recuperarnos de la crisis, siempre y cuando se alcancen también los objetivos en materia de empleo». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al II Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 29 y 30 de junio de 1984, sig.ant. C13/06, p. 21. Por otra parte, resulta enormemente significativo muchas de las referencias contenidas en un libro sobre la *experiencia socialista* editado por la fundación del PCE – Fundación de Investigaciones Marxistas– que recogería las ponencias de unas jornadas celebradas justo durante la aprobación de este paquete de medidas. Y en concreto nos remitimos a, SARTORIUS, Nicolás, “Dos años de gestión del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit..

⁹⁷ Consúltense las siguientes noticias, “El viraje de la política económica”, *El País*, 17 de abril de 1985; “Incentivos fiscales a la inversión y adquisición de viviendas”, *El País*, 1 de agosto de 1985.

⁹⁸ PSOE, Secretaria de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, “La política económica de los socialistas: balance de un ajuste solidario”, Madrid, 1986, sig. B 3482, p. 53. Añadiéndose: «Así pues, sin alterar ninguno de los objetivos básicos de la política económica se plantean y llevan adelante las medidas de mayo que, adicionalmente, en los objetivos llamados de flexibilización institucional, contienen elementos auténticamente modernizadores del aparato productivo, incluso por encima de sus significación coyuntural. En consecuencia, *las medidas de mayo no suponen un cambio ni en los objetivos ni en los fundamentos teóricos ni en la estrategia a medio plazo de la política económica del Gobierno. No hay, pues, un cambio de política económica, sino el desarrollo en el tiempo de la misma política y una acción coyuntural para compensar una desaceleración muy apreciable de la economía internacional y para reforzar inicialmente el despegue de la demanda interna*». Ibídem, p. 54 [cursiva en el texto original].

⁹⁹ Entre otras referencias véase el ‘positivo’ análisis que se realizaba a los dos años en, AHFPI, PSOE-CEF, “Informe de gestión al Comité Federal. Informe Político”, Madrid, 2 de octubre de 1987, sig. Fc 4009, vol. I. Consúltense en ese documento el apartado, “4. Demanda interna: consumo e inversión”.

¿Qué consecuencias económicas se perciben durante estos tres primeros años en el objetivo de alcanzar los fines macroequilibrios? Una vez tocado el *fondo* de la crisis económica que ya duraba más de siete años, en los siguientes ejercicios económicos se inicia una reactivación lenta y gradual. Así las variables económicas que se entrecruzan permanente en la limitación del crecimiento del PIB –la tasa de variación anual sería raquítica en estos años: 1,8%, 1,8% y 2,3% para 1983, 1984 y 1985 respectivamente¹⁰⁰– y que vienen dadas en lo básico por la incapacidad de generar un mayor nivel de Formación Bruta del Capital (FBC) –por ejemplo para los tres primeros años la tasa de variación anual de FBC real, como principal indicador sobre la sostenibilidad del crecimiento sería de -1,2%, -0,48%, 6,7%, para los años citados respectivamente¹⁰¹– y por un bajo nivel de consumo como señal evidente de la depresión económica generalizada, van a ir modificándose progresivamente¹⁰². Incluso, a pesar de que todavía se arrastran los efectos de la anterior crisis que había repercutido negativamente en el incremento de la demanda interior –los datos son los siguientes, 0,7%, -0,8%, 2,3% siempre medidos según la variación anual con respecto al PIB– pronto arrojan datos esperanzadores¹⁰³.

Como han destacado prácticamente todos los economistas, el único dato realmente positivo –“pocos más logros se pueden anotar”, apuntaría Carlos Berzosa¹⁰⁴– sería el incremento de las exportaciones que pasarían del 16% al 20% del PIB en estos años. Es decir, las políticas de liberalización de la economía, aún más ante la inminente entrada en la CEE, van a devenir en claves para una vez reforzado el sector exterior, incrementar la “recuperación del ahorro nacional y empresarial”¹⁰⁵. Con el añadido de una reducción considerable del déficit exterior que había lastrado la economía española desde hacía años.

¹⁰⁰ Ahora bien para Miguel Boyer aquellos datos suponían un claro triunfo de la política económica emprendida, en esa siempre extendida tendencia a no valorar adecuadamente los antecedentes más inmediatos: «En el conjunto de los años 1983-1985, el PIB tuvo un crecimiento acumulado de un 12,5 por 100 (frente al 2,4 de los cuatro años anteriores, 1979-1982)». BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, op.cit., p. 90.

¹⁰¹ Con fundada razón se decía en un documento del PSOE que existían «motivos de inquietud». Señalándose a continuación como «en la actualidad la formación bruta de capital representa sólo el 18% del PIB y el 37% del excedente bruto de explotación, frente a valores medios anuales en el período 1975-1983 del 21,6% y 49%, respectivamente». Lo que no era óbice para destacar unas líneas más adelante como el «resultado de la importante reducción real de los costes laborales unitarios y de la mejora de la productividad media del trabajo, *el excedente empresarial ha recibido un notable impulso en 1984*. Se ha pasado del 26,6% de participación del excedente neto de explotación en la Renta Nacional neta al coste de los factores en 1982 en 1984». PSOE, Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, “La política económica de los socialistas: balance de un ajuste solidario”, Madrid, 1986, sig. B 3482, pp. 17 y 23, respectivamente [*cursiva* en el texto original].

¹⁰² De notable interés al respecto, CASTILLO CASTILLO, José, *Sociedad de consumo a la española*, Madrid, EUDEMA, 1987.

¹⁰³ Datos que guardan una estrecha relación con el descenso del ahorro familiar tras la crisis de los setenta, que «de representar el 9 por 100 del PIB en 1974 bajó al 5,2 por 100 en 1983». BANDRÉS, Eduardo, “Gasto público y estructuras del bienestar: el sistema de protección social” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., p. 476.

¹⁰⁴ BERZOSA, Carlos, “La política económica del PSOE. Condicionantes y presupuestos” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., p. 76.

¹⁰⁵ FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit., p. 43. Autores quienes añadían los siguientes datos: «El déficit exterior llegó al 2,7 del PIB en 1981 y 2,5% en 1982, como consecuencia de la segunda crisis energética, que desplomó el índice de cobertura desde 104% en 1979 hasta el 86% en 1981, pero fue corregido a casi la mitad el año siguiente y convertido en superávit en los posteriores, hasta que volvió a abrirse con la expansión a partir de 1987. Como este desequilibrio siempre pone límites a la capacidad de endeudamiento, su corrección fue el logro más efectivo, claro e

Con todo, el saneamiento del mercado—por la vía de las reformas del sistema financiero e industrial— muestra ya sus más serios efectos: una reducción de los costes salariales unitarios, que no sólo se situaban comparativamente un 40% más barato con respecto a los países de su entorno, sino que son producto de una dura política de moderación salarial que conseguiría, en suma, que los salarios se mantuvieran por debajo de la inflación prevista. Por ejemplo, tan sólo entre 1982 y 1985 se desacelera su crecimiento un 6,5 por 100 y un 5,8 por 100, respectivamente¹⁰⁶. A pesar de esta evidencia, desde las instancias tanto del Partido como del Sindicato se mantendría como norma insistir, sin prácticamente datos reales contrastados que aguantarán el peso de tales afirmaciones, la tesis del “mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios” durante aquellos años¹⁰⁷. En todo caso, debe constatar que la inflación durante estos primeros años seguirá situándose muy lejos de las previsiones gubernamentales. Por ejemplo, si para 1984 se había fijado el objetivo del 8,0% esta será finalmente del 11,3%; para 1985 se fijaría el objetivo en el 6,0% siendo del 8,8%¹⁰⁸. Mientras tanto para estas fechas, los

inmediato del ajuste Boyer, más por la devaluación de la peseta y la debilidad de la coyuntura que por una eficaz reforma estructural». *Ibíd.*, p. 45.

¹⁰⁶ Muy significativo del sentido de las políticas socialistas en este sentido son los argumentos esgrimidos por, ESPINA, Álvaro, “La contribución de los salarios al ajuste de la economía española (1977-1982), *Información Comercial Española*, n° 607, (1984), pp. 29-40; y en, *id.*, “Política de rentas en España: 1977-1986”, *Papeles de Economía Española*, n° 22, (1985), pp. 343-161. Sobre el caso particular por el que se atravesó en 1984, sin duda uno de los más duros años de la crisis, TOHARIA CORTÉS, Luis, “La evolución de los salarios y los coste laborales en 1984”, *Economistas*, vol. II, n° 11, (1984), pp. 119-121. Una visión *alternativa* y sumamente ilustrativa en: ALBARRACÍN, Jesús, “El fundamento empírico de las repercusiones del crecimiento de los salarios sobre el empleo” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, *op.cit.*, vol. II, pp. 715-722.

¹⁰⁷ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presente la C.E.C. al I Comité Confederal”, Madrid, 13 y 14 de enero de 1984, sig. 002606-022, p. 4. Todavía más, pues desde la central ugetista se mantendría un apoyo sin fisuras esa política de rentas, llevada a cabo por los gobiernos socialistas durante aquellos primeros años: «La lucha contra el paro en el marco de la economía española y contando con las perspectivas o indicios de una lenta recuperación, impone una política salarial responsable que contemple, no sólo las retribuciones en mano que perciben los trabajadores ocupados, sino el crecimiento de las rentas que asalariados y pasivos perciben globalmente». *Ibíd.*, p. 7. Una política de rentas que había sufrido un giro de 180° grados tras la salida de su XXXIII Congreso celebrado en junio de 1983, y donde se pretendería superar la mera concepción salarial clásica —a un nivel más o menos teórico— para combinarla con un nuevo concepto acerca del salario social. Todo en una clara línea de adaptación a la propia orientación de las políticas del ejecutivo al respecto [sobre esta cuestión se volverá a hablar de forma detallada en el apartado “10.2.1. El momento de la toma de decisión política: *la irrevocable necesidad de flexibilizar* (marzo/mayo 1983-agosto 1983)”. Véase asimismo en aquel extenso informe de gestión el apartado “Relaciones U.G.T. – Gobierno”, en donde a pesar de la sintonía que se mantenía no se dejaba de hablar de «cierta complejidad y han atravesado momentos especialmente tensos». *Ibíd.*, p. 13. No obstante, tan sólo unos meses después ya se comenzaría a marcar mayores distancias. Así tras tildar la CEC de la UGT la relación con el Gobierno de cierto «escepticismo» se afirmaba: «El motivo de este descontento puede resumirse en que el Gobierno no da total cumplimiento al programa de Gobierno que sometió a la consideración de los ciudadanos y que fue respaldado por estos en una mayoría sin precedentes». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al II Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 29 y 30 de junio de 1984, sig. 002606-003, pp. 9-10. Por lo demás, sobre esta cuestión, en términos generales, se volverá a hablar largo y tendido y con numerosos datos macroeconómicos en el Capítulo “8. El precio de la modernización. «Principios de realidad» esenciales: los resultados macroeconómicos”.

¹⁰⁸ Para Alberto Montero estas desviaciones en las previsiones sobre la inflación no fueron casuales teniendo presente la imperante política de moderación salarial: «Las causas de estas desviaciones se buscaron en la fuerza de la demanda interna y en la espiral ascendente de los salarios promovida por la renegociación de los mismos en función de la inflación sufrida que, en estos años duplicaba a la esperada. De esta manera, el objetivo de indiciación salarial en función de la inflación prevista, considerando el sesgo sistemático a la baja de tales previsiones, se constituía en un instrumento de política económica para reducir el poder adquisitivo de los asalariados y, por lo tanto, en una coartada para impedir la capitalización, en forma de salarios, de las concesiones realizadas durante el período de crecimiento

excedentes empresariales obtendrán un incremento de más de tres puntos, en relación al Excedente Neto de Explotación en la estructura del VAB¹⁰⁹.

En la práctica estamos ante los efectos de una política unidireccional, que tenía en los trabajadores su principal punto de mira, por más que no se dejara de insistir en aquello de la política de “sacrificios solidarios”. Una cuestión que quedó meridianamente clara en un texto del propio Ministro de Economía Miguel Boyer, en donde tras pedir reiteradamente un gran “acuerdo de solidaridad y lograr un compromiso serio de lucha contra el desempleo”, insistía no sin *sarcasmo* ni *ironía* un,

«un esfuerzo de moderación salarial que el Gobierno pide a los trabajadores no disminuirá el poder adquisitivo global de los salarios, ya que se trata de favorecer una redistribución entre los que ganan mucho y los que ganan poco o se hallan en paro. Precisamente como contrapartida del esfuerzo de moderación salarial, el Gobierno ha previsto extender la cobertura del desempleo al 50 por 100 de los trabajadores desocupados [...]. El esfuerzo de moderación salarial es una condición imprescindible para crear empleo y hacer efectiva la solidaridad»¹¹⁰.

Con el acelerador de las reformas pisado a fondo, otras tantas variables seguirán viéndose perturbadas en los dos años siguientes. Sin ir más lejos, el consumo interno como acabamos de señalar, lo que repercutía en los bajos niveles de la demanda nacional como efecto de la contención salarial y de un porcentaje del paro que superaría los dos dígitos, para nunca más regresar a cifras por debajo del 15% a lo largo de toda la época socialista. En suma, tendencias de comportamiento económico que venían a romper el “esquema oficial” de recuperación sobre el que se había asentado la estrategia socialista:

«[L]a recuperación de la tasa de beneficio, que inducía la política salarial, no empujaba la acumulación; la que se realizaba, se dirigía a la racionalización de la producción, el ahorro de puestos de trabajo, y no al aumento de la capacidad productiva. Por el contrario, los efectos de la

económico». MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara..., op.cit.*, pp. 140-141. Consúltense en esta línea el trabajo clásico desde la academia liberal de, PIORE, Michael, *Paro e inflación. Perspectivas institucionales y estructurales*, Madrid, Alianza, 1983.

¹⁰⁹ ALBARRACÍN, Jesús, “La extracción del excedente y el proceso de acumulación” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del..., op.cit.*, p. 336. Un dato confirmado por el propio Miguel Boyer con evidente entusiasmo: «Los beneficios de las empresas se recuperaron también con rapidez. Mientras el conjunto de empresas que constituía la muestra de la Central de Balances del Banco de España presenta un resultado antes de impuestos consolidado de -0,7 por 100 de la producción en 1982, en 1984 fue positivo con el 0,5 por 100 y en 1985 del 1,7 por 100 (llegó a un máximo del 6,4 por 100 en 1988-1989). Esa recuperación de los beneficios empresariales fue el motor de la nueva onda de crecimiento de la inversión y del empleo que comenzó a partir de 1985». BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas..., op.cit.*, p. 91 [*cursiva* en el texto original]. «La estructura del ahorro privado cambió, asimismo, durante el gobierno de González. El ahorro empresarial creció durante el período de ajuste de 1982-1985, en paralelo con una recuperación del superávit bruto de explotación, del 10,4 por ciento en 1982-1983 al 14 por ciento del PIB, una cifra similar a las del período anterior a 1975». BOIX, Carles, *Partidos políticos..., op.cit.*, pp. 186-187. Por último véanse, RAYMOND, José Luis, GARCÍA VILLAR, Jaime y POLO ANDRÉS, Clemente, “Empleo e inversión en la economía española: 1955-1984”, *Papeles de Economía Española*, n° 26, (1986), pp. 200-216; y, SEBASTIÁN, Carlos, “Excedente empresarial, inversión en inmovilizado material y demanda de empleo en la empresa privada”, *Papeles de Economía Española*, n° 26, (1986), pp. 217-229.

¹¹⁰ BOYER, Miguel, “Por la solidaridad hacia la salida de la crisis” en PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *Un año para..., op.cit.*, p. 122. Muy significativo al respecto sería la entrevista concedida por el Ministro de Economía a *El País* y realizada por Joaquín Estefanía, quien elegiría la siguiente frase de Boyer para encabezar la misma de la siguiente forma: “Cada vez me siento más socialista y más heterodoxo”. Allí el propio Miguel Boyer cuestionaría todas y cada una de las señas de identidad de lo que quedaba de la tradición socialdemócrata del socialismo español. Entrevista, “Miguel Boyer”, *El País*, 14 de octubre de 1984.

política de austeridad y ajuste deprimían la economía agravando aún más la evolución de la acumulación y el empleo»¹¹¹.

Ahora bien, estamos en los años en que se recobrara la “confianza” en los inversores extranjeros. España volverá, en breve, a situarse como un mercado enormemente atractivo en donde invertir, pues junto con la mano de obra barata y flexibilizada se sumarán todo un conjunto de incentivos fiscales ya descritos. De este modo, el incremento de inversión privada durante estos años alcanzará una media del 14%¹¹². Inversión a la que se consideraba –dentro del esquema de actuación seguido– el canal por donde no sólo entraría el capital necesario sino también, y no es baladí, la tecnología necesaria e imprescindible para la recuperación definitiva de la economía del país¹¹³.

El reto de crear empleo –abandonada en junio de 1983 por el propio Solchaga la “promesa” de los 800.000 empleos no sin contestaciones dentro del Ejecutivo¹¹⁴ así como

¹¹¹ ALBARRACÍN, Jesús, “La extracción del excedente y el proceso de acumulación” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 325. De hecho, algunas voces aisladas dentro de la organización, incluso con altos cargos dentro del Gobierno, como fue el caso de Luis Martínez Noval, reconocerían como la «evidencia empírica española de las últimas décadas pone de relieve, al igual que la de otros países de la OCDE, que la variable relevante a efectos de redistribución es el empleo». MARTINEZ NOVAL, Luis, “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-equidad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 201. Contraste lo dicho con el estudio de, ÁLVAREZ ALEDO, Carlos [et al.], *La distribución funcional y personal de la renta en España: un análisis de sus relaciones*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996.

¹¹² Consúltense los datos aportados por, entre otros, el entonces Secretario de Estado de Economía (1986-1988), DEHESA, Guillermo de la [et al.], *Las inversiones extranjeras en España y españolas en el exterior*, Barcelona, Orbis, 1987.

¹¹³ Las referencias a la idealización del ‘mana’ de la inversión extranjera junto el reconocimiento de los ‘mimos’ recibidos por parte de la Administración socialista, son múltiples en los textos de la organización socialista. Entre otros muchos ejemplos que se pueden localizar nos detenemos en el siguiente: «Pero este proceso [apertura de la economía española], además, ha servido de acicate para fortalecer la inversión directa extranjera que al calor del dinamismo de nuestra oferta y de la expansión de la demanda está instalándose con fuerza en España. De hecho, la inversión extranjera ha tenido un valor positivo por su contribución a la formación interna del capital, por su tecnología y por la renovación en los méritos de gestión que contiene». AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, p. 22.

¹¹⁴ Entre los diversos testimonios sobre aquel pequeño-gran acontecimiento político el del Ministro de Industria es relevador de dos síntomas, que irían tomando cuerpo en los siguientes años: el primero, la plena autonomía de los Ministros de Economía e Industria con respecto al resto; y segundo, los constantes roces cuando no enfrentamientos dentro del Gabinete pero también entre Gobierno/Sindicato. «Cuando en un acto público [declaraciones realizadas en un simposio de empresarios extranjeros organizado por el *The International Herald Tribune*, un 1 de junio de 1983] me preguntan por los ochocientos mil puestos de trabajo, yo digo que con el tipo de política económica que habíamos decidido adoptar eso era sencillamente imposible». La reacción dentro del Gobierno encabezada por Guerra no tardó en llegar como recuerda el propio Solchaga: «Bueno, Alfonso Guerra dijo en el Consejo de Ministros que iría al congreso de la UGT, que daba la casualidad que se estaba celebrando esos días, y que trataría de suavizar el tema. Lo que hizo fue decir en el congreso que no había que hacer caso a pesimistas y que se crearían más de ochocientos mil puestos de trabajos. Tan fue la tensión, que Felipe González, para evitar que creciesen las especulaciones, me hizo aparecer el domingo siguiente en un palco junto con Alfonso Guerra para presenciar la final de la copa de fútbol, que [me] parece que fue en Zaragoza». Declaraciones de Carlos Solchaga en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, op.cit., pp. 152-154. Por el lado del propio Guerra calificaría sencilla y llanamente aquellas declaraciones como un *sabotaje* contra «la posición del Gobierno en el Congreso del sindicato, y de manera particular me situaba en una difícil posición, pues de la confirmación general del programa hacía obligado hablar de la creación de puestos de trabajo». Más todavía, pues quien fuera Vicepresidente del Gobierno consideraba que aquello obedecía a una estrategia planificada: «Esta técnica de dinamitar congresos fue utilizada profusamente por los miembros más conservadores del Gobierno y del partido. Ya no habría Congreso del Partido sin que uno

también desde el propio Partido¹¹⁵ – va a evidenciarse como inviable. Así los socialistas durante estos tres años no van a ser capaces de frenar la “sangría del desempleo”¹¹⁶. En suma, aquello terminara constituyendo “una demostración de impotencia terrorífica” por parte de los gobiernos socialistas en dar solución al siempre mencionado problema del paro¹¹⁷. Tan sólo entre 1974 a 1985 se destruirán 2.160.000 puestos de trabajo, a lo que se sumaría la llegada de medio millón de nuevos trabajadores. Población potencialmente activa compuesta, en lo básico, por la sobresaliente entrada en el mercado de trabajo de un amplio conjunto de mujeres así como de la primera cohorte de la generación del *baby boom* español.

En esta etapa –así como en las siguientes dentro de la “década del cambio” – las tasas de paro siempre serían superiores a la de los gobiernos de la UCD. Resultó así que “en los años que subía el excedente bajó la inversión y empleo”; y por el contrario “[m]ientras que en los que ha estado estancando el excedente, han subido fuertemente las inversiones, el empleo y las rentas salariales percibidas por las familias españolas”, según la doctrina oficialista de la época¹¹⁸. Así el aumento del desempleo por sí preocupante en los anteriores años, durante esta primera fase de reformas se incrementara alarmantemente ante el intenso proceso de destrucción de trabajo que se continúa registrando: desde el 15,9% de 1982 al 21,5% de 1985, llegándose en esta fecha a más de tres millones de parados y triplicándose los parados de larga duración. La

de los miembros del Gobierno o del partido poco afectos a la dirección publicasen unas explosivas declaraciones en la mañana de inauguración del Congreso, o en el día anterior. Y casi siempre en el periódico más leído por los socialistas». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., pp. 132-133. Véase al respecto lo ya apuntado en el Capítulo 6, nota 259.

¹¹⁵ En octubre de 1983 la dirección federal del PSOE –en un claro gesto de voluntarismo político– todavía seguía señalando: «El objetivo de creación de empleo se sitúa para 1984 en 180.000 puestos de trabajo netos y para 1985, en torno a los 680.000 puestos de trabajo. Ello permitiría reducir el índice de desempleo en más de 3 puntos en 1986. Una coyuntura económica internacional favorable nos permitiría alcanzar el objetivo de los 800.000 puestos de trabajo establecido en nuestro Programa Electoral». AHFFLC, PSOE-CEF, “Documento de estrategia”, octubre de 1983, sig. AI-647-08 p. 27. Un año después cualquier referencia a la promesa electoral había desaparecido casi por completo de la documentación socialista. Por ejemplo, véase la omisión de esta cuestión en un texto de la importancia como el contenido en, AHFPI, PSOE, “El Gobierno ante la crisis económica. Explicación de la política económica e industrial de los socialistas”, Madrid, abril de 1984, Fc 381, pp. 60-ss.

¹¹⁶ Muy significativas al respecto serían las reflexiones del mismo Secretario Federal de Organización del PSOE, José María Benegas, quien señalaría en una entrevista en *Cambio 16*, la manifiesta incapacidad del Gobierno de cara a realizar un *giro social real*. Entrevista que bajo el título: «No hay dinero para el cambio» llegaba en un punto de inflexión, en donde se mostraría cada vez más claramente la escasa voluntad política del gobierno de modificar su línea política económica, con o sin ciclo económico favorable. Entrevista, “José María Benegas”, *Cambio 16*, 14 de enero de 1985.

¹¹⁷ FUENTE, Emilio de la, “Las etapas de la política económica del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., p. 84.

¹¹⁸ COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Recuperación económica y...”, op.cit., p. 17. Véase además la aportación de, ALBARRACÍN, Jesús, “La política económica y el empleo” en id. (ed.), *Reflexiones sobre política...*, op.cit., quien apuntaba lo siguiente: «[L]as inversiones que se realizaban tenían un fuerte componente ahorrador de trabajo. Se rompía, así, el esquema manejado oficialmente: la recuperación de la tasa de beneficio que inducía la política salarial no empujaba a las inversiones, cuando estas se realizaban, ahorraban puestos de trabajo y, por el contrario, los efectos de la política de austeridad y ajuste deprimían la economía agravando aún más la evolución del empleo». Ibídem, p. 148. En esta misma línea, AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, pp. 33-ss. Consúltense también los argumentos esgrimidos por, SANROMÀ, Esteve, TRULLÉN, Joan y GARRIDO, Antoni, “De la moderación salarial a la recuperación de la inversión: crítica de una cadena secuencial” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, op.cit., vol. II, pp. 737-768; y, GARCÍA LÓPEZ, José y ALVIRA MARTÍN, Francisco Ricardo, “La familia española y el paro”, *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 40-56.

vía principal de despido durante esta primera etapa sería a través de los conocidos “expedientes de crisis”¹¹⁹.

Si ya en 1985 se ve la luz al *final del túnel* de la crisis económica es por la suma de un conjunto de elementos. Y no todos ellos son atribuibles a las políticas socialistas en sentido estricto¹²⁰. Primero, en 1982 “el ciclo económico había alcanzado su punto más bajo, la economía internacional daba muestras de una ligera recuperación”¹²¹. Junto a este *cambio de ciclo* que se consolida en los tres años siguientes, motivado, en gran medida, por la caída del dólar en 1985¹²², se añadirá la disminución del precio del barril del petróleo hasta los 12 dólares cuando había llegado a estar en 40 dólares. Un aspecto esencial para la mejora del saldo de importaciones¹²³. Esto último será realmente importante, pues junto a la bajada de los precios del crudo que había estrangulado la por sí mermada balanza de pagos, se inicia por parte del Gobierno una política de “ahorro en la utilización del petróleo” que permitiría reducir el consumo en 18 puntos entre 1980 y 1988. Como apuntó el propio Miguel Boyer:

«Para España, que, junto con Italia, era de los países europeos con mayor dependencia del petróleo en su abastecimiento de energía primaria (un 73 por 100), el coste de las importaciones de crudo pasó de suponer un 1,3 por 100 del PIB en 1973, a un 6,1 por 100 del PIB en 1981, y en los años hasta 1985, este drenaje del PIB español hacia los países exportadores de petróleo se mantuvo, en promedio, en el 5 por 100»¹²⁴.

Otro factor que no se puede dejar de relacionar con la mejora de la situación económica será la muy *relativa* “paz social” que imperaría en los últimos compases de aquella reformista¹²⁵. Una *paz social* tanto como condición política como económica en la estrategia gubernamental, aunque los técnicos socialistas siempre desconfiaran en último término de su

¹¹⁹ «Factor que explica la aplicación de ERE alrededor de la cuarta parte de los trabajadores afectados». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, p. 29. Y en cuanto a sus efectos directos apuntaban la siguiente cifra: «600.000 personas en 1985 entre extensión, suspensión y reducción de jornada». *Ibidem*.

¹²⁰ De interés es el interrogante planteado en su día por Donato Fernández y Gustavo Matías: «Pero este nuevo ciclo dejó la duda de si se habría producido también sin los esfuerzos de los años de ajuste y, sobre todo, sin el aumento de las desigualdades en la distribución de la renta, aunque estas habrían sido indudablemente menores de no haber aumentado tanto el gasto público en los años previos». FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, p. 51.

¹²¹ MARTÍN ACEÑA, Pablo y MORENO, Begoña, “Miguel Boyer Salvador” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, *op.cit.*, p. 214.

¹²² Sobre la evolución del dólar en esa fecha crítica hasta años después nos remitimos a, APARICIO, Luis, “La fuerza del euro es alargada”, *El País, Negocios*, 28 de noviembre de 2004.

¹²³ Sobre este asunto, MASSARAT, M., *Crisis de la energía o crisis del capitalismo*, Barcelona, Fontamara, 1979; CENTENO, Roberto, *El petróleo y la crisis mundial. Génesis, evolución y consecuencias del nuevo orden petrolero internacional*, Madrid, Alianza, 1982; y, NORENG, Oystein, *La política del petróleo en la década de los ochenta: normas de cooperación internacional*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

¹²⁴ BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, *op.cit.*, pp. 84 y 91. En el mismo trabajo en el Cuadro 2, “Evolución del coste de las importaciones españolas de petróleo en porcentaje del PIB” se proporcionan las siguientes cifras: 3,3% en 1979; 5,1% en 1980; 6,1% en 1981; 5,7% en 1982; 5,6% en 1983; 5,2% en 1984; 4,5% en 1985; 1,9% en 1986; 1,7% en 1987; 1,3% en 1988; 1,4% en 1989; 1,4% en 1990; 1,2% en 1991; y 1,1% en 1992. *Ibidem*, p. 111.

¹²⁵ Véase lo apuntado en la *nota* 27.

“eficacia económica [...] así como de su compatibilidad con reformas estructurales profundas e inevitablemente impopulares”¹²⁶.

Por más que en el IV Epígrafe se volverá con detenimiento en todas estas cuestiones, al menos, quede apuntado lo siguiente. Ta *experiencia postgolpista* del ANE¹²⁷, el gobierno socialista conseguirá no sin dificultades dos acuerdos dispares con la CEOE, CEPYME, UGT y con CCOO en uno de ellos. El primero de ellos sería el AI en febrero de 1983¹²⁸. Un acuerdo social menor, de mínimos y producto del efecto electoral del año anterior que firmado por UGT y por las propias CCOO no sin recelos cuando no contradicciones palpables, permitió el recién elegido Gobierno, que todavía asistía en primera línea a la celebración del 1º de Mayo, una etapa de cierta tranquilidad para la implantación de su proyecto socioeconómico¹²⁹. El segundo, el AES en octubre de 1984 tras fracasar un posible nuevo acuerdo interconfederal, tendría otra dimensión en un contexto de grandes operaciones políticas-jurídicas en relación al mercado laboral –reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984, Ley de Protección al Desempleo, aprobación de la jornada de 40 horas y de los 30 días de vacaciones o la puesta en marcha de la LOLS...–. De hecho, la firma por parte de la CEOE y de la UGT del AES –que no de CCOO ya entonces la segunda fuerza sindical– le garantizaría cierta estabilidad y tranquilidad durante los dos años siguientes años (1985/1986) tanto en materia de salarios –y por consiguiente de control de la inflación– como en lo relativo a un naciente como frustrado modelo de concertación social clave en el proyecto modernizador¹³⁰. Un acuerdo que conllevará asimismo una reducción acusada de la conflictividad laboral: un -49% en 1985 y un -30% en 1986¹³¹. En cualquier caso,

¹²⁶ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 343. El mismo autor remarcaba como los «técnicos responsables de la política económica mostraron desde el primer momento un escaso entusiasmo por las políticas neocorporativistas de los gobiernos anteriores». *Ibidem*.

¹²⁷ Nos referimos al Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) firmado un 9 de junio de 1981 por la CEOE, CCOO y UGT al que le acompañarían de numerosas medidas jurídicas de cara a reactivar un deprimido mercado de trabajo. Sobre sus alcances jurídicos, GARCÍA BECEDAS, Gabriel, “El Acuerdo Nacional sobre Empleo y la cláusula de «consolidación sindical»”, *Civitas*, nº 13, (1983), pp. 63-92. Y para su repercusión en el terreno de socio-laboral y sindical, OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, *op.cit.*. Véase, por lo demás, las valoraciones realizadas por los firmantes en su momento: CEOE, *Una nueva política de empleo*, Madrid, CEOE, 1981; CCOO. SECRETARIA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de la Moncloa al AES*, Madrid, Confederación Sindical de CCOO / Secretaria Confederal de Formación y Cultura, 1989, con prólogo de Agustín Moreno; y, UGT, *ANE: Acuerdo Nacional sobre Empleo. Textos, comentarios, desarrollo legal*, Madrid, UGT, 1981. Sobre su negociación, desarrollo y alcances véase el apartado “9.3.2.1. El Acuerdo Nacional de Empleo: a vueltas con el secretismo en torno a la contratación temporal (enero/febrero 1981-junio 1981)”.

¹²⁸ Nos referimos al Acuerdo Interconfederal de 1983 firmado un 15 de febrero por CEOE, CEPYME, UGT y CCOO.

¹²⁹ Como recuerda, nuevamente, Charles Powell, «en 1985 González ya no participó en los actos organizados por UGT con ocasión del Primero de Mayo, la primera vez que faltaba a dicha cita desde el retorno de la democracia». POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 354.

¹³⁰ Nos referimos al Acuerdo Económico y Social firmado un 9 de octubre de 1984 por CEOE, UGT y Gobierno.

¹³¹ ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE, Rafael, “La política económica...”, *op.cit.*, p. 15. Un *éxito* que el PSOE trataría de ‘vender’ tanto de cara al interior como al exterior como fruto de su estrategia de solidaridad, aunque recordando, eso sí, el papel ‘protagonista’ de los trabajadores. Un papel de *protagonista* que, en breve, se iba a ver modificado sustancialmente: «Evidentemente, no ha sido así, y cabe destacar especialmente el mérito y el sentido de la responsabilidad de los trabajadores y de las centrales sindicales que los representan en la lucha contra la inflación, atribuible prioritariamente a la política de moderación salarial instrumentada consensualmente por los agentes sociales». PSOE, *Cuatro años cumplidos...*, *op.cit.*, p. 14.

de forma monográfica se volverá sobre el asunto en el epígrafe IV –*Historia de una reforma laboral*¹³²–.

Aquí tampoco puede olvidarse un acontecimiento que a la postre devendría en central: la puesta en marcha de la *Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social*¹³³. Conocida popularmente como la ley de la reforma de las pensiones. Ley que desembocaría en la huelga general de junio de 1985, y que estaría protagonizada por CCOO y otras fuerzas sindicales menores. Huelga que aunque ganada en la calle y en los centros de trabajo, sería en la práctica ignorada por un crecido Ejecutivo. Como tiempo tendremos de ver en el Capítulo 8, aquel primer “aviso” tendría una especial importancia en la posterior ruptura de una siempre maltrecha concertación social durante los gobiernos socialistas¹³⁴. Pero no sólo, pues a pesar de no ser apoyada formalmente por la UGT, la misma participaría en los diversos actos de protesta, y varios parlamentarios ugetistas con Nicolás Redondo en primera línea votarían en contra en la tramitación final de la conocida como reforma de las pensiones. E incluso otros socialistas como Ricardo García Damborenea – secretario general del PSOE en Vizcaya y condenado tiempo más adelante por su implicación en los GAL– abandonarían las Cortes antes de la votación de la citada Ley. Un primer paso político a la par que simbólico, que comenzaría a *despejar* el camino del divorcio dentro de la familia socialista como se expondrá en al *anexo* que cierra este capítulo.

De cualquier de las formas, según el *discurso oficial*, se iba en la dirección correcta por más que se insistiera que sólo había un posible camino o que el mismo era *inevitable*¹³⁵, siempre en esa búsqueda de eufemismos y metáforas sobre la “salud” de la economía de mercado, que con el paso del tiempo se tornarían en irreversibles¹³⁶. Aunque aquello era palmariamente falso –ello sin las recuentes comillas o las socorridas cursivas– dicho discurso repetido insistentemente tuvo la “virtud” de constituirse en un “intento de destrucción de la propia idea de alternativa de progreso desde la izquierda”¹³⁷. Sin embargo, las *bendiciones* a este único camino –al denominado “éxito socialista”¹³⁸– llegarían por todas partes con el FMI¹³⁹, el BM¹⁴⁰

¹³² Nos remitimos aquí al Epígrafe, “IV. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”.

¹³³ Ley 26/1985, de 31 de julio, *de Medidas Urgentes para la racionalización de la estructuración y de la acción protectora de la Seguridad Social* [B.O.E. 1 de agosto de 1985].

¹³⁴ En concreto en el apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales* y humanos”.

¹³⁵ Término empleado por, FUENTES QUINTANA, Enrique y REQUEJO, Jaime, “La larga marcha..., *op.cit.*, quienes terminaban afirmando: «En las economías de mercado no es posible, en la actualidad, escoger entre varias políticas de ajuste, porque sólo hay una: la que tiende a adaptar el mecanismo productivo a las nuevas circunstancias de precios y demandas relativas. Cualquier otro diseño de política está condenado al fracaso [...]. Esa única política posible de ajuste se compone de dos partes: las medidas de saneamiento y las de reforma». *Ibídem*, p. 36.

¹³⁶ Sobre la desconstrucción semántica del lenguaje periodístico y de otros tantos ámbitos relacionados con el saber y el poder: LOZANO, Irene, *El saqueo de la imaginación*, Barcelona, Debate, 2008.

¹³⁷ SARTORIUS, Nicolás, “Dos años de gestión del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 9, quien relacionaba la estrategia del PSOE en «línea de actuación liberal conservadora». Añadiendo, «lo que es más grave, pregonando a los cuatro vientos la pretensión, profundamente pesimista y sin esperanza, de que dicha opción es ineluctable como si se tratase de un fenómeno de la naturaleza». *Ibídem*.

¹³⁸ «No estoy muy seguro de que la política socialista, o la política económica de Boyer, no haya tenido éxito; probablemente, lo que se está cumpliendo es lo que se buscaba. Con toda seguridad se puede afirmar que es una política económica con un gran éxito, independientemente de que sea asumida o no por el partido socialista». FUENTE, Emilio de la, “Las etapas de la política económica del PSOE” en *ibídem*, p. 81.

la OCDE¹⁴¹ y el Banco de España por delante¹⁴² como se encarga de apuntar la siempre influyente redacción de *Papeles de Economía Española*:

«La insistencia en una misma política económica configurada con todas las apariencias de una conclusión inevitable, se ha realizado en 1984, con rotunda claridad, en los distintos y más prestigiosos informes sobre la situación española (Banco de España, OCDE, FMI) ha llenado de contenido los discursos económicos del Gobierno y de la oposición. Resulta difícil negar hoy la fuerza dialéctica de esta política de ajustes. Y a su lógica se han rendido casi todas las opiniones. Como afirmara en sus conclusiones el Informe de la OCDE sobre España, ‘no existe solución de recambio viable a la estrategia actualmente aplicada por las autoridades para lograr una recuperación duradera de la producción y del empleo a medio plazo’»¹⁴³.

Por su parte, tanto desde dentro del Gobierno como desde el Partido no se tendrían mayores dificultades –aunque con evidentes y fuertes contradicciones en el terreno no sólo de la dialéctica sino también de la estricta lógica– a la hora de explicar el camino seguido. Su *explicación*, su *justificación*, y por tanto su *objetivo* de mantener la misma política económica, iría perfeccionándose en cada uno de los documentos internos –textos congresuales, boletines de comunicación interna, notas de prensa, circulares...– como a través de la múltiple documentación –dirigida y ejecutada principalmente por el siempre competente Equipo de Documentación Política– destinada al “consumo externo”.

Con *cuentagotas* también han ido llegando las explicaciones a medio camino entre lo académico y las memorias personales¹⁴⁴. Aunque los argumentos presentados ganarían con el paso del tiempo en complejidad, la tesis principal no variaría en base a tres líneas maestras: primero, a la ya repetida consigna de la “única política posible”; se sumaría, en segundo lugar,

¹³⁹ Véase lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 34* y *nota 206*.

¹⁴⁰ Para estas fechas, BANCO MUNDIAL, *Informe del Desarrollo Mundial 1986*, Madrid, Tecnos, 1986.

¹⁴¹ Entre otros muchos, y de cara a una visión global de la década de los ochenta, OECD, *Economic Surveys of 1985-1986*, Paris, OECD, 1986; OCDE, *Ajuste estructural y comportamiento de la economía*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990; o, id., *Economías en transición. El ajuste estructural de los países de la OCDE*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990.

¹⁴² Entre otros, BANCO DE ESPAÑA, *Informe anual*, Madrid, Banco de España, 1983; id., *Informe Anual*, Banco de España, 1984; o, id., *Informe anual*, Madrid, Banco de España, 1985. Con razón Casimiro García-Abadillo llegaría a decir: «El Banco de España hacía de soporte técnico e ideológico a la política económica del Gobierno. Los boletines del Banco de España, si hacían algún tipo de crítica, siempre la hacían a toro pasado: nunca se llegó a decir que la política que se estaba haciendo no era la adecuada para ese momento. En esos tiempos no había en el país ningún departamento o servicio de estudios privado que pudiera competir con el del Banco de España [...]. Es decir, que apenas había contraste de ideas, no había crítica desde el punto de vista técnico y por ello el Gobierno ejercía con total autoridad su política económica». GARCÍA ABADILLO, Casimiro, *El balance...*, *op.cit.*, pp. 22. De igual forma se expresaría el siempre moderado Joaquín Estefanía: «Durante los años en los que gobernó el PSOE bajo la presidencia de González, el Banco de España fue uno de los principales aparatos ideológicos y técnicos de apoyo a su política económica. En esos años es muy difícil encontrar una disensión relevante entre la opinión de los responsables de la política económica del Ejecutivo y los informes y declaraciones del banco emisor». ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, *op.cit.*, p. 249. Muy parecida opinión expresaron, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, pp. 227-ss. Aquí de nuevo consúltese el trabajo de, MARTÍN ACEÑA, Pablo, *El Servicio de Estudios...*, *op.cit.*.

¹⁴³ Nota editorial de la *Redacción de Papeles de la Economía Española*, nº 21, (1984), p. 2. Por su parte, Juan Velarde no dudaría en calificar el año 1984 –tras la aprobación del AES así como de los presupuestos generales– como el «fin de la utopía»: «Todo este panorama nada tiene que ver con ninguna aurora social que vaya a iluminar un nuevo mundo para el proletario. Nada de marcha hacia la utopía pues». VELARDE FUERTES, Juan, “El final de las utopías” en *Economistas*, vol. II, nº 2, (1984), p. 20, dentro del dossier monográfico, *España 1984: un balance*.

¹⁴⁴ Nos remitimos a la *nota 1* del Capítulo 6.

el rechazo a las medidas neoliberales de los gobiernos anglosajones; y tercero, no se desperdiciaría ocasión en resaltar la crisis de los paradigmas tradicionales de la segunda mitad del siglo XX. Compaginando todo ello con la *idea-fuerza* de cómo los socialistas se habían “ido alejándose de los dogmas iniciales adquiriendo una visión cada vez más «instrumental» de la economía”¹⁴⁵. Ahora bien, más allá de la defensa de su estrategia, esta política tendrían un destinatario, un objetivo central: desmarcarse de las cada vez más frecuentes acusaciones que asociaban al gobierno socialista de estar practicando sin disimulos una política neoliberal¹⁴⁶. Frente a ello se oponía sin mayores soportes teóricos ni analíticos la hipótesis de la “política de ajuste solidario”.

«A primera vista, un balance de estos diez últimos años consistiría en decir que ante la crisis ha surgido una nueva política económica de derechas, claramente definida e impulsada con mano de hierro en varios países, notablemente en los Estados Unidos y en el Reino Unido: se trata de la política llamada neo-liberal, basada en teorías monetaristas puras. Su aparente solidez y coherencia, así como la relativa simplicidad con que puede ser fundamentada han contribuido a que aparezca como la respuesta hegemónica ante la crisis hasta el punto de que muchos piensan que los partidos socialistas europeos –entre ellos el PSOE– se han visto atacados de una fiebre neoliberal en su política económica

Esto no es cierto. Existe una respuesta socialista a la gran depresión económica actual. Existe una gestión socialista de la crisis, diametralmente opuesta a la gestión liberal. Se trata de una política económica que combina austeridad con la solidaridad. En España, la política de ajuste solidario del PSOE también se inscribe dentro del marco de esa respuesta socialista puesta en práctica en diversos países europeos»¹⁴⁷.

7.1.2. Continuidad y desaceleración reformista: los llamados «años dorados» del socialismo (1986-1989/1990)

La perseguida “eficiencia económica”, a través del diseño y la implementación de las *políticas de ajuste*, ofrecería a no más tardar resultados palpables. Se estaba ante el inicio del “despegue que empieza a producirse con claridad”, según el mismo Felipe González¹⁴⁸. Pero no sólo, pues a partir de 1986 con el cambio de ciclo económico ya consolidado y con una economía aparentemente saneada, la fuerza de la lógica inherente de la *estrategia de*

¹⁴⁵ AHFPI, PSOE-CEF, “La política social (1983-1987)”, Madrid, abril de 1988, sig. Fc 6817, p. 15.

¹⁴⁶ De izquierda a derecha, aunque con diferentes objetivos, la acusación de practicar una dura política de ajuste de orientación liberal, conservadora, pro-empresarial... sería una constante, en adelante. Nuevamente desde la izquierda recogemos algunas de las críticas que en su día se llevarían a cabo: «[E]l partido socialista ha realizado la política de ajuste más dura, más conservadora, de todo el período de la transición [...]. Se ha hecho una política económica y social durísima para los trabajadores y para las capas populares». SARTORIUS, Nicolás, “Dos años de gestión del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., p. 16. En cualquier caso, nos remitimos a las conclusiones sostenidas para todo el III Epígrafe de esta investigación en, “8.4. Un posible balance en torno a la época socialista alejado de los lugares comunes”.

¹⁴⁷ AHFPI, CHAVES, Manuel, “Presentación” en PSOE, Secretaria de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, “La política económica de los socialistas: balance de un ajuste solidario”, Madrid, 1986, sig. B 3482, p. 7. Largo y fundamentado documento partidista en donde participarían además del Secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales de la CEF del PSOE, Manuel Chaves, los siguientes cuadros socialistas: Valeriano Gómez, Juan José Barrera, Gustavo Sariago, Manuel Escudero, Julio Rodríguez y Francisco Fernández Marugán. Un documento que tendría su continuación dos años después, AHFPI, PSOE-CEF, “La política social (1983-1987)”, Madrid, abril de 1988, sig. Fc 6817. Texto en donde se volvería a insistir en las mismas hipótesis: «La casi totalidad de los países se ven inmersos en la ola [neoliberal]. Como en la situación anterior la diferencia se va a producir entre quienes efectúan el ajuste con criterios solidarios y progresistas y quienes lo ofertan con criterios regresivos». *Ibidem*, p. 13.

¹⁴⁸ GONZÁLEZ, Felipe, “Prólogo” en PSOE, *Cuatro años cumplidos...*, op.cit., p. 6.

modernización socialista se mostrara más evidente por sí todavía faltaban pruebas. No había un final posible a la misma una vez realizada la apuesta por priorizar, sí o sí, el crecimiento “económico indiscriminado” a través de la apuesta por el capital privado¹⁴⁹. Lejos, lejísimos, quedaban ya los “tibios” postulados socialdemócratas con lo que lo socialistas se habían presentado a las elecciones del ochenta y dos. Nos encontramos, ante lo que se ha denominado, no sin doble intención, como el “aprendizaje liberal” de los socialistas españoles¹⁵⁰.

Hasta el cierre de este periodo que puede extenderse a las fechas de 1989/1990, nos encontramos con unos años que contienen una “coherencia interna indudable”, en donde el adjetivo “«socio-liberal» no es una arbitrariedad, sino que tiene fundamentos indudables”¹⁵¹. Se cierra así la que se ha denominado por parte de la literatura socialista como la etapa por el *pacto social por la democracia y la modernización* comenzando la del *impulso económico y social*¹⁵². Más allá de etiquetas oficiales o militantes, a lo largo de este nuevo periodo/etapa económica se volverían a mostrar en toda su crudeza los dilemas, *trade-off*, entre inflación/empleo y crecimiento/igualdad a los que se venían enfrentando los gobiernos socialistas, siendo calificado este último como “el principal problema de las políticas socialdemócratas de los gobiernos socialistas del Sur de Europa a lo largo de los años ochenta”¹⁵³.

Una segunda fase dentro de la “década del cambio” en el que surgirán nuevas y más duras pruebas para el proyecto modernizador socialista. Si en la anterior legislatura se había evidenciado con todo realismo como la hegemonía electoral no conlleva ni una hegemonía social automática ni menos una autonomía en la política económica; en la segunda legislatura tendrá que afrontar tres grandes retos estrechamente relacionados: primero, la *ruptura* de la “familia socialista”; segundo, la huelga general del 14 de diciembre de 1988; y tercero, la gestión del llamado *giro social*, al que más pronto o más tarde se le culpará de todos los males de los desequilibrios económicos¹⁵⁴.

Con Carlos Solchaga asentando firmemente como Ministro de Economía –tras la sonada como esperable salida de Boyer tras la primera crisis de los Gobierno socialista¹⁵⁵– resultó

¹⁴⁹ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 80. Todo ello con las perniciosas consecuencias señaladas en su día por Fernando Esteve Mora: «[L]a dificultad en la valoración y cuantificación con la que se esgrime la cifra del PIB conseguida, lo que suele significar la minusvaloración de su importancia real a la vez que también con ello se sugiere, implícitamente, su inevitabilidad, en el sentido de que el deterioro de los otros factores de bienestar aparece como el precio inevitable que se ha de pagar por el crecimiento económico, y eso independientemente del tipo de política económica que lo esté definiendo». ESTEVE MORA, Fernando, “Crecimiento y bienestar. La economía que no está en el PIB” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política...*, op.cit., p. 242. Véanse también las agudas reflexiones que planteara en su momento, ANISI, David, “Economía: la pretensión...”, op.cit..

¹⁵⁰ RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “De la agonía a la agonía” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, op.cit., p. 66.

¹⁵¹ ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, op.cit., pp. 334-335.

¹⁵² TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 35.

¹⁵³ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia...”, op.cit., p. 61.

¹⁵⁴ Sobre todas estas cuestiones volveremos extensamente en, “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

¹⁵⁵ Nos remitimos aquí a lo ya indicado tanto en el Capítulo “5. Gabinetes «tecnocráticos» y «liberales» para los nuevos tiempos” así como en lo apuntado en el apartado “6.2.1.1. Principios de realidad: el Programa Económico a Medio Plazo”.

evidente que no estaba previsto un cambio de rumbo¹⁵⁶. Sólo de forma más *metafórica* que *real* se preguntarían algunos socialistas de forma aislada, si era necesario *cambiar la orientación general* de la política seguida¹⁵⁷. Y los pocos que así lo hicieron contestaron “NO” de forma mayoritaria y sin titubeo alguno¹⁵⁸. El propio Presidente del Gobierno, de hecho retaría –no de forma metafórica sino real– en no pocas ocasiones a los sindicatos a que le convenciera de que existía *otra política posible*, que asegurara el crecimiento económico y los parabienes de la política hasta entonces seguida. Reto que los sindicatos aceptarían, aunque con pobres resultados.

Menos dudas se tendrían desde la propia dirección del Partido para quien el camino elegido era el correcto sin mayores autocríticas¹⁵⁹. “No hemos errado” se convertiría en una de la de máximas más repetidas en aquellos años¹⁶⁰. En fin, como llegaría a decir Nicolás Redondo “[e]staban encandilados con las propagandas liberales de turno”¹⁶¹. Por lo demás, la mejor

¹⁵⁶ Sobre todos los movimientos de Solchaga dentro del Gobierno con los empresarios, con los sindicatos así como con sus intervenciones en el Congreso, véase el ya citado libro de, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*. En esta línea, la explicación dada por Alfonso Guerra en su día es muy ilustrativa de la *imposibilidad* de un posible cambio de estrategia: «Pero llega un momento en el tiempo cuando esa primera [meta] está ya conseguida. Y entonces se puede ser más socialista que nacionalista para entendernos. Puede que a los dirigentes políticos sólo les cabe realizar un gran proyecto y que, una vez conseguido éste, le sea muy difícil cambiar el *chip*, diseñar otro proyecto y también conseguirlo». Declaraciones en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 142. Véanse aquí la crítica que realizarán al respecto: AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, pp. 21-ss.

¹⁵⁷ Como recordaría José M^a Maravall: «González siempre insistió una y otra vez en ‘no dar marcha atrás en el camino recorrido’, ‘no retroceder en el tiempo’, porque la expansión económica había ‘requerido ajustes dolorosos’». MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, p. 86, *nota 13*, quien cita algunas de las frases del propio presidente del Gobierno empleadas en los debates del Estado de la Nación acontecidos de la segunda mitad de la década de los ochenta y principios de los noventa para avalar su argumentación.

¹⁵⁸ Léanse aquí los argumentos planteados por el Secretario de Estado de Economía en aquellos momentos, FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Miguel Ángel, “Sobre la política...”, *op.cit.*, pp. 145-156. Se preguntaba en aquella ocasión lo siguiente: «¿Hay que cambiar la orientación general de esta política? Yo creo que podría haber dos argumentos para hacerlo. El primero, sería que dicha política no hubiera tenido éxito. El segundo, que ya se hubieran alcanzado los objetivos propuestos y que, por tanto, fuera la hora de plantearse otros objetivos y, en consecuencia, también otra política». Concluyendo: «Pero no es éste el caso de la política económica española». *Ibíd.*, p. 145. Del mismo autor un año antes, *id.*, “La política económica del Gobierno socialista”, *Leviatán*, n^o 23-24, (1986), pp. 41-51. Véase, asimismo, MUÑIZ, Miguel, “Opciones de política...”, *op.cit.*.

¹⁵⁹ Dos ejemplos ilustrativos para estos años: «Esta estrategia es la que se ha venido aplicando y la que habrá que seguir instrumentando, tanto más cuanto que todos los modelos socio-económicos e incluso teóricos están en revisión, cuando no profundamente cuestionados». AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria de gestión 1981-1984 [al] 30º Congreso, Madrid, 13-16 diciembre”, Madrid, PSOE-Comité organizador del XXX Congreso, 1984, sig. Fc 279, p. 12; «En esta perspectiva puede decirse que la política económica a seguir en España debe persistir en la convergencia con la que ha venido actuando. Se situará ante la exigencia de preservar el control de los equilibrios básicos y la de obtener los resultados adecuados de los esfuerzos hasta ahora realizados. Por eso, al establecer una serie de objetivos políticos y económicos sería irrealista ignorar las limitaciones y las restricciones que toda política económica posee. Los objetivos que pretendemos debe perseguirse manteniendo los equilibrios macroeconómicos». AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 35.

¹⁶⁰ AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria de gestión 1981-1984 [al] 30º Congreso, Madrid, 13-16 diciembre”, Madrid, PSOE-Comité organizador del XXX Congreso, 1984, sig. Fc 279, p. 12.

¹⁶¹ Declaraciones de Nicolás Redondo en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 213. Probablemente, el periodista Cándido lo supo captar como pocos otros: «Pues cuando se alcanza el

demostración de esta hipótesis es el relato de las ideas y venidas de ministros y la posición intocable –a pesar de sus repetidas “amenazas” de dimisión en 1984 y 1991¹⁶²– de la que disfrutó el mismo Solchaga en Economía y Hacienda.

El inicio de esta segunda etapa estará guiado por la “improvisación de la política económica”, lo que se traduce en una “total ausencia de cualquier tipo de planificación o programa económico a medio plazo”¹⁶³. El fin temporal de los sucesivos *Programas Económicos a Medio Plazo*, que para mediados de los años ochenta se habían visto superados ampliamente por la realidad económica imperante, dará paso a un tipo de planificación económica a corto plazo. Ejemplo de ello son tanto los PGE junto con los *Informes Económico-Financieros*¹⁶⁴ que les acompaña. O también los propios *Informes de Coyuntura Económica*¹⁶⁵.

poder ya no hay un camino que explorar, hay un camino que seguir [...]. De pronto, el hombre de poder comprende que el futuro de una sociedad no debe dejarse en manos de los idealistas, que no están hechos para el poder». CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, *op.cit.*, p. 74.

¹⁶² La primera amenaza de dimisión sería en febrero 1984. La justificación: el alto coste de la reconversión industrial y sus constantes enfrentamientos con los sindicatos. Como destacaría Charles Powell: «El momento clave de la reconversión se produjo en febrero de 1984, cuando Solchaga, a modo de experimento, intentó rescindir los contratos de los trabajadores del grupo Aceriales, que habían ido a la huelga en defensa de sus puestos de trabajo. Fuertemente presionado por Redondo y la UGT, González accedió a garantizar el sueldo y el puesto de trabajo de los afectados mediante una suspensión temporal de los contratos por cuatro años, ante lo cual Solchaga presentó una dimisión que no le fue aceptada» [POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 348]. Por su parte, Mariano Guindal ha recordado el crítico momento que España vivía con incendiarias manifestaciones y con un conflicto social-laboral en auge. Llegaría a hablar de un «país en llamas». Más allá de la forma en que se resolvió uno de los nudos gordianos de la reconversión industrial, a saber los contratos de los trabajadores – cuestión sobre la que se volverá en el Capítulo “11. En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero/febrero 1984-julio 1984)” – en aquella dimisión de un 8 de febrero mucho tendría que ver, primero, el documento redactado por González y Corcuera, pero sobre todo «[e]staba harto de todo, nadie le quería, se sentía solo luchando contra molinos de viento y encima con la amenaza de ETA que le quería asesinar». El asunto, finalmente, se resolvió por vías inesperadas, y gracias a la tenacidad del propio Presidente quien no quiera a Solchaga fuera del Consejo de Ministros, una vez convertido en uno de sus puntales. La primera vía sería una llamada de González al avión en donde viajaban Solchaga junto con Redondo y Zufiaur. Puesto al habla Redondo le diría el Presidente: «-Solchaga me ha presentado su dimisión, tienes que convencerle para que no lo haga –pidió González; -Presidente, no sé cómo voy a conseguirlo; -Tú sabrás como; -Haré todo lo que esté en mi mano». También intervendría, pese a su disgusto, el propio Guerra en evitar aquella potencial dimisión. Una conservación que terminaría de la siguiente manera: «-Yo te garantizo que, cuando pase lo peor de la reconversión y se llegue a un acuerdo con los sindicatos, todo el gobierno y el partido te apoyarán sin grietas ni reservas; Soy más escéptico-concluyó Solchaga». Finalmente, Carlos Solchaga retiraría su dimisión. GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, *op.cit.*, pp. 238-240. Por otro lado, el segundo *amago* de dimisión tendría lugar en agosto de 1991 ante los primeros ‘roces’ con el propio Felipe González. Sobre las aspiraciones políticas de Solchaga véase el amplio retrato de, RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “Carlos Solchaga Catalán” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, *op.cit.*. Para el testimonio del propio interesado consúltense sus declaraciones en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 156.

¹⁶³ MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, pp. 130 y 135, respectivamente.

¹⁶⁴ Los *Informes Económico-Financieros* que adjuntaban a cada presentación de los PGE serían realizados, principalmente, por la Dirección General de Previsión y Coyuntura. A partir de los *presupuestos* de 1990 desde el Instituto de Estudios Fiscales –organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda– asimismo se llevarían a cabo unos amplios y documentados trabajos que acompañarían a los mismos. Tanto unos como otros son de enorme utilidad. Entre otros apartados que habitualmente suelen contener han de destacarse los siguientes: *los objetivos de política económica* junto con los escenarios económicos *ad hoc*, *el marco institucional y jurídico del sector público* y *las políticas y prioridades del gasto público*. Todo ello sumado a una numerosa y valiosa información estadística, que con el paso del tiempo irían adquiriendo una mayor solvencia metodológica, aunque los errores en las previsiones seguirían siendo una de las notas características.

Ambos realizados por la Dirección General de Previsión y Coyuntura dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda¹⁶⁶. Como destacó Charles Powell en su día: “En cierta medida [...], los futuros gobiernos del PSOE vivirían de los réditos del ajuste efectuado en los años 1983-1985”¹⁶⁷.

Más allá de la improvisación y el cortoplacismo de muchas decisiones económicas de los gobiernos socialistas, lo que afectaría al control/seguimiento de múltiples variables macroeconómicas, lo *económico*, no obstante, se va a seguir imponiendo a lo *político*. El año 1986 es paradigmático al respecto, todavía más teniendo en cuenta que se trataba de un año electoral, en donde por medio estaba la reciente integración en la CEE y el tantas veces citado referéndum de la OTAN. El PSOE como el *partido* del Gobierno se jugaba, en lo primordial demostrar que los sacrificios habían merecido la pena. En aquella coyuntura se evidenciaría, de hecho, la “gran autoridad moral sobre las capas sociales más desfavorecidas” que Gobierno y Partido conservaban, según un relato *amable* de aquel tiempo¹⁶⁸.

Por su parte, un conjunto no desdeñable de datos económicos vinieron a confirmar dicha realidad. Por vez primera en mucho tiempo el incremento del PIB crecería por encima del 3% – en concreto lo haría al 3,3%– situándose la inflación en el 8,8% y en camino de encadenar porcentajes cercanos al cinco por ciento. Mientras que el déficit público bajaba al 5,5%¹⁶⁹, lo que sumado al crecimiento del FBC en un 15% hasta cuotas no vistas antes, confirmaban el *giro* en lo económico.

Sin embargo, si nos alejamos de aquella maraña de indicadores, de discursos técnicos sobre la superación de la crisis económica y los relatos *ad hoc* en torno al esperanzador porvenir futuro ahora ya en un marco europeo, otras tantas variables evidenciarían las principales debilidades del sistema. Dejando de un lado la involución de las rentas de los asalariados en la riqueza global del país, junto el retraso secular en el proceso de convergencia social con los países europeos, resultaba que, a pesar del inicio de creación de un alto empleo, el mismo en su

¹⁶⁵ En el caso de los citados *Informes de Coyuntura Económica* sería a partir de 1986 – coincidiendo con el fin real del *Programa Económico a Medio Plazo*– cuando estos comenzarían a publicarse con tal nombre. El organismo que realizaría los mismos sería la Dirección General de Previsión y Coyuntura. Anteriormente, le correspondió a la Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía la publicación de los citados *informes de coyuntura* –aunque con otras dimensiones y características que los anteriores– siendo dados a conocer a través de la publicación periódica *Nota económica: para información interna*. En cualquiera de los dos casos a través de estos documentos desde el Ministerio de Economía y Hacienda, se llevaban a cabo las previsiones a corto como a medio plazo de la economía del país. A lo largo del trabajo cuando se estime oportuno se señalarán y emplearán algunos de los citados informes.

¹⁶⁶ Véase lo apuntado en el Capítulo 5, *nota 81* y *nota 106*.

¹⁶⁷ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 342.

¹⁶⁸ MARÍN ARCE, José M^a, “Los socialistas en...”, *op.cit.*, p. 53.

¹⁶⁹ «Lo más preocupante era que el déficit se iba autoalimentando como consecuencia de la refinanciación del servicio de la deuda (amortización del principal y pago de intereses) y sólo una pequeña parte procedía del incremento de los gastos». FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, *op.cit.*, p. 46. En este sentido consúltense varios de los trabajos del dossier monográfico de *Papeles de Economía*, n^o 24, (1985) dedicado, precisamente, al tema del déficit. Entre otros tanto desde una perspectiva nacional como internacional: CHOURAQUI, Jean Claude, “Los déficits públicos en los países de la OCDE: causas, consecuencias y remedios” (pp. 2-33); LÓPEZ LÓPEZ, M^a Teresa, “Ajustes de la imposición de la OCDE y de España ante la crisis” (pp. 154-180); y, ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, “El comportamiento del gasto público en la OCDE y en España” (pp. 181-201).

mayoría era de carácter temporal/precario. Lo que no evitaría, además, que el desempleo se mantuviera habitualmente por encima del 20%¹⁷⁰.

Incluso en estos tiempos de bonanza las tasas oficiales proporcionada por el propio Gobierno –y sin entrar por el momento en mayores detalles– mostraron la incapacidad del nuevo modelo económico en absorber una abundante como barata mano de obra: 21,0%, 20,2%, 19,2% y 17,2% serán las tasas de paro durante 1986, 1987, 1988 y 1989. Y todo ello a pesar de que el Gobierno vía la Administración gastaría “siete billones en luchar contra el paro” a través de “seis billones en cobertura del desempleo, medio billón promocionando el empleo y casi otro medio en formación profesional”¹⁷¹.

Igualmente todas estas medidas no evitarán con el paso del tiempo –cuando no lo fomentarán por otros caminos– la aparición de elementos enormemente preocupantes con respecto al mercado de trabajo: junto con el inicio del proceso de sustitución de fijos por temporales, se ha de añadir, primero, la aparición de la cultura de la temporalidad/precariidad – como un fenómeno histórico nuevo– y segundo el hecho de cómo el paro se concentrará especialmente en tres sectores laborales: la juventud, la mujeres y los emigrantes retornados¹⁷². Sectores cuyo riesgo de exclusión social –precisamente lo que Robert Castel denominara las franjas de la “vulnerabilidad social”¹⁷³– se incrementará exponencialmente durante estos años ochenta. De este modo, la *dualización laboral* –junto con sus efectos directos o indirectos– va a instalarse progresivamente como un problema estructural de la economía evidenciando al mismo tiempo la resolución del *trade-off* entre inflación y empleo.

Todo lo anterior no significa que no se creará empleo. Se calcula, aproximadamente, que se crearía en esta etapa un millón y ochocientos mil empleos netos. Datos y más datos que serían pronunciados decenas, centenas de veces, por unos socialistas orgullosos de sus “éxitos”. Ahora bien, al contrario de lo que han mantenido los “apologistas gubernamentales”, tanto desde las esferas oficiales como académicas, el *motor* del crecimiento del empleo no se fundamentaría en la política de moderación salarial como tantas veces se ha insistido. Como destacó Jesús Albarracín para estos años:

¹⁷⁰ Uno de los mejores retratos para estos años y precisamente desde un punto de vista no académico en, RACIONERO, Luis, *Del paro al ocio*, 7ª ed., Barcelona, Anagrama, 1984.

¹⁷¹ COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Recuperación económica y...”, *op.cit.*, p. 18.

¹⁷² Si nos atenemos a las cifras que ofreciera en su día Antonio Zabalza, en gran medida, el masivo desempleo sobre estos colectivos mucho tuvo que ver, primero, con las más de dos millones de mujeres que se incorporaron a la población activa, y los 600.000 emigrantes retornados. ZABALZA, Antonio, “La recesión de los noventa en la perspectiva de los últimos treinta años de crecimiento económico”, *Moneda y Crédito*, nº 202, (1996), pp. 11-64. Sobre este último aspecto resultan de interés detenerse en los estudios de los años setenta y ochenta que vinieron a examinar el citado fenómeno del ‘retorno’. Entre otros, CASTILLO CASTILLO, José, *La emigración española en la encrucijada. Estudio empírico de la emigración de retorno*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981; TEZANOS, José Félix, “Cambio social y...”, *op.cit.*. Igualmente consúltese el interesantísimo trabajo desde una perspectiva de historia social, BABIANO, José y FERNÁNDEZ ASPERILLA, *La patria en la maleta. Historia de la emigración española a Europa*, Madrid, Ediciones GPS / Fundación 1º de Mayo, 2009, y en concreto el “Capítulo 7. Quedarse o volver: dilemas al final de un trayecto” (pp. 245-289); y un año antes, TORRE CAMPO, Joseba de la y SANZ LAFUENTE, Gloria (eds.), *Migraciones y coyuntura económica del franquismo a la democracia*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. Más aproximaciones sobre este relevante fenómeno, no siempre bien calibrado en un posible estado de la cuestión, en, EGEA, Carmen, NIETO, Antonio y JIMÉNEZ, Francisco, “El estudio del retorno. Aproximación bibliográfica”, *Migraciones & Exilios*, nº 3 (2002), pp. 141-171. Por su parte ocasionalmente la Ejecutiva Federal del PSOE, y en concreto su Departamento de Juventud junto con la Secretaría de Inmigración, se harían eco de este importante fenómeno político, social, cultural y demográfico. Véase, por ejemplo, AHFFLC, PSOE-CEF, Departamento de Juventud-Secretaría de Inmigración, “La segunda generación inmigrante”, Madrid, 1985-1986, sig. AI-347-02.

¹⁷³ CASTEL, Robert, *La metamorfosis de...*, *op.cit.*.

«La causa de la fuerte creación de puestos de trabajo, que se ha producido desde 1985, hay que buscarla en la recuperación cíclica que se ha registrado en la economía española y no en ninguna pretendida bondad de la política salarial que se ha mantenido. El hecho de que el crecimiento del empleo se haya concentrado sobre nuevas actividades o en las empresas pequeñas, muestra que la política salarial ha tenido poco que decir»¹⁷⁴.

Antes de avanzar en este terreno, a la hora de interpretar el *papel* que decide jugar el Gobierno no sólo nos debemos interrogarnos por los resultados económicos, sino por otras dos cuestiones básicas. La primera de ellas ya se ha dejado apuntada: las debilidades y déficit del modelo de crecimiento así como sus repercusiones tanto económicas como sociales. En relación a esta segunda cuestión, es decir, las políticas de legitimación de un sistema político-económico, tras las *pruebas* superadas durante los años anteriores; las mismas seguirían operando desde muy similares bases. O dicho de otra forma, a pesar de sus altas tasas de crecimiento, se pospusieron voluntariamente las políticas tendentes para una mejor redistribución de la renta hasta el *shock* del 14-D¹⁷⁵.

Valga advertir también, por el momento, en torno a esta complicada cuestión de la *legitimación* del proyecto socialista en estos años lo siguiente¹⁷⁶: una vez que puede darse por iniciado la fase definitiva de la consolidación democrática, e incluso cuando se ha asistido al proceso de “integración” de la clase obrera a la naciente democracia, y superado el ciclo conflicto del último trimestre de 1983 y el primero de 1984, si bien se eliminaría el riesgo de una conflicto social generalizado, no obstante, las raquíticas políticas sociales y la precarización del mercado laboral, en breve, surgirán con una inusitada fuerza una amplia respuesta obrera y social –con una fuerte presencia de jóvenes, principalmente, a través del movimiento estudiantil– que volverá a cuestionar, precisamente, las bases consensuales de la modernización socialista¹⁷⁷.

Por otro lado, y a pesar de que más adelante se volverá a tratar el asunto de forma detallada¹⁷⁸, el gasto social crecería en estos años a una media del 4% anual, lo que en todo caso

¹⁷⁴ ALBARRACÍN, Jesús, “La política económica y el empleo” en id. (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, p. 156.

¹⁷⁵ Datos específicos para la década de los ochenta en, AYALA, Luis, MARTÍNEZ, Rosa y RUIZ-HUERTA, Jesús, “La distribución de la renta en España en los años ochenta: una perspectiva comparada” en *I Simposio sobre igualdad y redistribución de la renta y la riqueza*, IX vols., Madrid, Fundación Argentaria, 1993, vol. II, pp. 101-136. Véase también en este sentido, ALVAREZ-MIRANDA, Berta [et al.], *Dilemas del estado...*, *op.cit.*. Nuevamente, nos remitimos a los datos manejados en el apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

¹⁷⁶ Recuérdense las tesis mantenidas hace cerca de tres décadas por el propio, HABERMAS, Jürgen, *Problemas de legitimación...*, *op.cit.*. Para la *integración* de la clase obrera, WAISMAN, Carlos H., *Modernización y legitimación...*, *op.cit.*. Junto a lo apuntado en otros epígrafes resultan de notable interés no pocos trabajos del sociólogo Víctor PÉREZ DÍAZ: *Clase obrera, partidos...*, *op.cit.*; id., “Los obreros españoles ante la empresa en 1980”, *Papeles de Economía Española*, nº 7, (1981), pp. 282-309. Y finalmente para una visión internacional el estudio de, BERINS COLLIER, Ruth, *Paths toward democracy. The working class and elites in Western Europe and South America*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. Igualmente, y junto con la bibliografía citada en el apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinares”, y en concreto, la tesis doctoral de, CALZADA GUTIÉRREZ, Inés, *La tela que...*, *op.cit.*.

¹⁷⁷ Junto con lo apuntado tanto en la *Presentación* como en los diferentes capítulos que han conformado el Epígrafe “II. La conquista del poder político del socialismo español: la *misión histórica* del PSOE (1972-1982)”, véase el trabajo teórico, SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, “Consenso y desacuerdo en la democracia española actual” en id. (ed.), *Consenso y enfrentamiento en la Democracia española*. Dossier monográfico, *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea*, nº 9, (2010), pp. 15-34. Un trabajo en el que se abordan cuestiones de muy notable interés para entender tanto la época socialista como todo el periodo histórico que se inicia entre 1975/1978 hasta el presente vivido.

¹⁷⁸ En concreto, en el apartado 8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

no evitaría que al final de la “década del cambio” se siguiera cinco puntos por debajo de la media europea¹⁷⁹. Un gasto social que puede y debe calificarse más que como “moderado” como “bajo”, teniendo presente la situación de partida y los costes sociales/humanos que provocó una crisis de casi diez años de duración. Como señaló José Viñals la aguda crisis por la que había pasado la economía dejó su factura: entre el inicio de la misma a su recuperación (1975-1985), el PIB per cápita por habitante en relación con la CEE pasa del 81,1% en 1975 al 79,2% una década más tarde¹⁸⁰.

Concretemos los datos y algunas realidades históricas básicas. Las partidas sociales crecieron un “94,0 por 100 en términos reales” entre 1982 a 1989¹⁸¹, siempre muy por debajo de lo que lo hacía el PIB. E igualmente se reconocieron y se extendieron una serie de derechos universales desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 a la Ley General de Sanidad de 1986 o la Ley de Pensiones no Contributivas en 1990, todas ellas ampliamente recordadas y reconocidas por la ciudadanía¹⁸². Aunque sea mucho menos conocido – lógicamente– no está de más recordar que muchas de estas medidas aprobadas no sólo contarían con la oposición de las autoridades económicas públicas, sino que en la práctica o bien respondieron a la necesidad de mantener la *clientela electoral*, o bien al “pago” de determinadas demandas sociales y políticas ante de desarrollo de considerables conflictos¹⁸³. Todo ello antes que a cualquier tipo de proyecto a medio y largo plazo, y asentando en unas etapas definidas, de consolidación y extensión del estado del Bienestar por parte de los socialistas.

Por lo demás, “a lo largo de la década, [se] atendió más a la expansión cuantitativa de las políticas sociales que a la mejora cualitativa de las prestaciones; es decir, más que incrementar la calidad media de los servicios sociales aumentó el número de beneficiarios”,

¹⁷⁹ Como planteó Eduardo Bandrés: «[L]os años 1982-1992 conforman una etapa de estabilización en el esfuerzo presupuesto en materia de gastos sociales: apenas 1,2 puntos de aumento sobre el PIB en ocho años, concentrados principalmente en educación y servicios de asistencia social; estos últimos doblan su participación en el PIB, pero apenas tienen incidencia en los resultados globales dado su escaso peso específico en el presupuesto. Aunque el crecimiento de los gastos sociales en términos reales no fue menor que en los años precedentes, el fuerte dinamismo del PIB en la segunda mitad de los ochenta oscurece los avances de la política social en un periodo en el que se produjo una clara mejora en las prestaciones reales medias». BANDRÉS, Eduardo, “Gasto público y estructuras del bienestar: el sistema de protección social” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, pp. 637-638. Véase también para la primera mitad de la década de los ochenta el estudio de, RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, *El gasto público...*, *op.cit.*

¹⁸⁰ VIÑALS, José, “La economía española ante el cambio de siglo” en TUSELL, Javier, LAMO DE ESPINOSA, Emilio y PARDO, Rosa (eds.), *Entre dos siglos: reflexiones sobre la democracia española*, Madrid, Alianza / Fundación José Ortega y Gasset, 1996, p. 423. Véase aquí también, COMÍN, Francisco, “La difícil convergencia de la economía española: un problema histórico”, *Papeles de Economía Española*, nº 63, (1995), pp. 78-92. Y dentro de ese mismo número de la citada revista que viene a conformar un dossier monográfico sobre el citado proceso de convergencia: MARTÍN GONZÁLEZ, Carmela, “La convergencia real en Europa: un referente clave para la política económica española” (pp. 2-17). En otra línea aunque con resultados similares: GENESCA, Eric y SALAS FUMÁS, Vicente, “Convergencia microeconómica España-Europa, 1982-1992”, *Documento de Trabajo. Serie amarilla. Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social*, nº 116, (1995).

¹⁸¹ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia...”, *op.cit.*, p. 63.

¹⁸² Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, *reguladora del Derecho a la Educación* [B.O.E. 4 de julio de 1985]; Ley 14/1986, de 25 de abril, *General de Sanidad* [B.O.E. 29 de abril de 1984]; y, Ley 26/1990, de 20 de diciembre, *por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas* [B.O.E. 22 de diciembre de 1990], respectivamente. Sobre esta última normativa véase “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

¹⁸³ Entre otros muchos ejemplos véase: Noticia, “Hacienda desaconseja el proyecto de universalizar la sanidad y cargar todo el coste al Estado”, *El País*, 18 de agosto de 1988.

según reconoció un destacado dirigente socialista¹⁸⁴. Por esta misma vía de incrementar el gasto social sin una ordenación detallada, se tuvo por fin más que resolver el *trade-off* entre crecimiento e igualdad, que de contener los posibles desajustes que la crisis estaba ocasionando entre amplias capas de la clase trabajadora, y más concretamente dentro de las franjas más bajas y/o populares.

Unas políticas que no deben confundirse con el adjetivo redistributivas, pues su cometido –más allá de ir configurando un insuficiente estado del Bienestar¹⁸⁵– sirvieron antes que nada para evitar y/o frenar conflictos sociales de calado como se viene manteniendo. Igualmente, estas políticas esperadas por parte de un Gobierno denominado como socialista, tendieron a legitimar más que una política económica específica a un régimen económico. Por tanto, la “cuestión social” lejos de resolverse como demostraron, de nuevo, los conflictos obreros pero también sociales de finales de los años ochenta y primeros noventa, seguiría siendo una de las “asignaturas” pendientes del sistema democrático. Un ciclo conflictivo con no pocas consecuencias políticas, entre ellas, la ruptura casi definitiva de una posible concertación social durante el resto de legislaturas socialistas, y con ello la importante fractura entre Partido-Sindicato. En todo caso, las victorias electorales de 1986 y 1989 confirmaron un apoyo electoral sobre el que se volvió a valer el Gobierno/Partido para justificar, en adelante, tanto los sacrificios acometidos como los futuros por venir¹⁸⁶.

Distinguidas estas pequeñas notas, y volviendo a los resultados de la política económica socialista, lo cierto es que la apuesta del crecimiento económico en línea con la estrategia de acumulación, ofreció óptimos resultados en sus variables centrales durante los cuatro siguientes años¹⁸⁷. Por ejemplo, el PIB crecería de media anual durante 1986, 1987, 1988 y 1989 un 3,3%, un 5,5%, un 5,1% y un 4,8%, respectivamente. El fuerte control de la inflación reportó resultados dentro del siempre problemático caso español. Del 8,8% de inflación para 1986 se llegaría durante 1987 y 1988 a un 5,2% y un 4,8% respectivamente, constituyendo los registros más bajos para la “década del cambio”. Pero la inflación se dispararía rápidamente al año siguiente hasta el 6,8%. Incluso en 1988 que es cuando la inflación se mantendrá más “baja” se estaría entonces a más de tres puntos de distancia con los países de la CEE¹⁸⁸. Asimismo ha de subrayarse la mejora con respecto al déficit público situado en un 5,5%, un 3,7%, un 3,3%, y un 3,5% para estos mismos años. Una mejora que mucho tendrá que ver con el incremento de la capacidad recaudatoria y de ahorro del Estado, pasando del 36,1% del PIB en 1986 al 40,1% del

¹⁸⁴ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia..., *op.cit.*..

¹⁸⁵ Como recordó en su día Julio Aróstegui: «[E]l PSOE no renunció nunca programáticamente al Estado del Bienestar, si bien el mantenimiento de éste se hacía a costa de continuas concesiones al gran capital y acosta del endeudamiento progresivo y peligroso del Estado». ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, *op.cit.*, p. 337.

¹⁸⁶ Nos remitimos una vez más a “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

¹⁸⁷ Balances para estos años: BERZOSA, Carlos, *Economía, crisis o...*, *op.cit.*; VALDÉS, Pedro, *La crisis económica de los ochenta (1980-1990)*, Madrid, Edición del autor, 1989. Y en concreto, CRUZ ROCHE, Ignacio, DESTENTADO, Aurelio y RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, *Política social y...*, *op.cit.*. A complementar con la bibliografía citada en la nota 8.

¹⁸⁸ Durante todos estos las previsiones gubernamentales con respecto a la inflación estuvieron simplemente ‘equivocadas’. Para 1987 el 5%; para 1988, 3,0%; para 1989, 5,7%. Véase en el Capítulo 8, el “Gráfico 8. Evolución comparada de la inflación entre España y la CEE, 1977-1993 (%)”.

PIB en 1991¹⁸⁹. Pero también ha de tenerse presente –como se insistiría desde la UGT– que tal “reducción del déficit se [haría] a costa de las necesidades sociales”¹⁹⁰.

En cualquier caso, el fraude fiscal seguiría una realidad al final de la época socialista. Después de lo que acontecería con la reforma fiscal de José V. Sevilla y la posterior normativa para frenar el grave problema del fraude fiscal –junto con otros hechos ya destacados¹⁹¹–; las demandas de nuevas y más generosas *amnistías fiscales* se terminarían por convertir en un lugar común en cada Legislatura hasta nuestro presente. Incluso el propio Carlos Solchaga –en una inusual declaración progresista– denunciaría esta cuestión, ante una petición al respecto formulada por Manuel Fraga a mediados de los años ochenta. Ocurriría durante el debate de la reforma parcial del IRPF a la altura de 1985:

«Yo les diré que esto no es verdad, que no está demostrado en ningún caso y en ningún país que se haya producido, y les diré que lo que sí es verdaderamente grave, desde el punto de vista de la equidad, de la justicia y de la distribución de la carga fiscal, es que después de saber cómo sabe todo el país que a pesar de todo el esfuerzo del Gobierno sigue existiendo una injusta distribución de la carga fiscal en este país, al final amnistíen ustedes a quienes han venido de alguna manera defraudando a todos los españoles a través de prácticas fraudulentas. (*Aplausos en los bancos de la izquierda*)»¹⁹².

Matizaciones aparte que se podrían realizar sobre lo anterior, *economía formal* –y también la *informal* como veremos¹⁹³– crecía a un excelente ritmo¹⁹⁴. Recuperados y consolidados los excedentes empresariales, y con ello incrementada la rentabilidad del capital a unos altos niveles y mejorados el saldo comercial, podía darse por concluido la primera fase de la recuperación¹⁹⁵. En todo caso, las preguntas eran otras en el momento en que nos *salimos* del discurso dominante:

¹⁸⁹ Sobre los presupuestos de esta política, BORRELL, Josep, “Balance del sistema tributario”, *Papeles de Economía Española*, nº 30-31, (1987), pp. 56-63.

¹⁹⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al XXXV Congreso Confederal”, Madrid, 1990, sig. 0067-001, p. 17.

¹⁹¹ Vuelva a revisarse lo apuntado previamente al respecto en el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)” y en concreto la *nota 61* y *nota 62*.

¹⁹² SOLCHAGA, Carlos, “Presentación en el Congreso de los Diputados el día 22 de octubre de 1985 del proyecto de ley de reforma fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, *Hacienda Pública Española*, nº 99, (1986), pp. 205-220. Como recuerda Carles Boix tras el descubrimiento en 1988 de que «1,2 billones de pesetas, cerca del 3 por ciento del PIB» era «dinero negro invertido en primas de seguros especiales» se reactivaría la lucha contra el fraude fiscal. En lo que califica como un ‘éxito’ recuerda asimismo como en «1990 el número de declaraciones de la renta presentadas había crecido hasta cerca de los 11 millones, con lo que casi se duplicaban las cifras de 1981. Tras crecer un 6,4 por ciento anual en términos reales en diez años, en 1990 la base imponible nacional era casi el doble de la de 1981 medida en pesetas constantes». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, pp. 181-182. Sobre este asunto también, LASHERAS, Miguel Ángel, RABALDÁN, Isabel y SALAS, Rafael, “Política redistributiva en el IRPF entre 1982 y 1990”, *Cuadernos de Actualidad de Hacienda Pública Española*, nº 7, (1993), pp. 165-172. Por último véase el informe, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, *Informe sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1989.

¹⁹³ Para estos años concreto véase, VIAÑA, Enrique, “Economía informal” en CAMPO, Salustiano del (dir.), *Tendencias sociales en...*, *op.cit.*, vol. III, pp. 35-46. Consúltense en ese mismo trabajo los aclaratorios cuadros estadísticos (pp. 43-45). Igualmente véanse las tablas y gráficos manejados al respecto en el apartado “8.1. ¿El gran salto adelante?” así como el correspondiente “Anexo estadístico”.

¹⁹⁴ Véanse las impresionantes cifras que ofrecía el periódico de mayor tirada de la nación un domingo en portada: Noticia, “Las empresas cuadruplican sus beneficios en dos años”, *El País*, 16 de noviembre de 1988.

¹⁹⁵ Consúltense, BONILLA HERRERA, José M^a, “El déficit permanente de la balanza comercial española”, *Papeles de Economía Española*, nº 11, (1982), pp. 46-68.

«¿Se justifican los ajustes a corto plazo y la reestructuración por la construcción de una estructura económica sólida y potente, con amplias perspectivas de futuro, que se aseguren los grandes equilibrios económicos y sociales?»¹⁹⁶.

O como directamente se preguntaron Fernando Esteve Mora y Rafael Muñoz:

«[C]abe preguntarse si una política económica de recomposición de los excedentes empresariales puede tener éxito *per se*, independiente del resto de los factores que afectaban a la inversión»¹⁹⁷.

El siguiente paso lógico de cara a mantener el ritmo de crecimiento en una sociedad que se encaminaba a alcanzar cuotas de crecimiento –antes de que de un estricto desarrollo, insistimos una vez más– tenía que girar “necesariamente mediante la recuperación de la demanda privada como elemento dinamizador del sistema económico”¹⁹⁸. Postergada la salida de la crisis durante cerca de una década, los primeros síntomas positivos empujaron rápidamente los bajos niveles de consumo privado que se venían registrando.

La modernidad se avenía a toda prisa y el consumo de determinados bienes duraderos se incrementó, como la señal evidente de que las cosas comenzaban a marchar razonablemente para cada vez un amplio mayor sector de la sociedad. La propia modificación de la estructura del consumo –lo que se conoce como la *función de consumo* o *principio de diferenciación generalizada*¹⁹⁹– que se produce en aquel tiempo constituye una variable central para retratar los cambios de sociales, culturales... que conllevará la salida a la crisis²⁰⁰. Un proceso que llegaría a ser calificado como el de una “pequeña revolución”²⁰¹. Un hecho, que fue oportunamente observado por el propio Ejecutivo en sus respectivos informes anuales²⁰².

¹⁹⁶ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 73.

¹⁹⁷ ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO LLORENTE, Rafael, “La política económica...”, *op.cit.*, p. 12.

¹⁹⁸ TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 27. Véase aquí también, MARTÍNEZ SERRANO, José Antonio, “Fluctuaciones, desequilibrios y políticas macroeconómicas” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 683.

¹⁹⁹ CASTEL, Robert, *La metamorfosis de...*, *op.cit.*, p. 372. Dentro de la literatura sociológica esta cuestión tendría un amplio desarrollo a partir de la conocida obra de, BAUDRILLARD, Jean, *La société de consommation*, Paris, Denoël, 1970.

²⁰⁰ «[E]l consumo privado representa una cuantía próxima al 62 por 100 del PIB y la formación de capital es equivalente al 20 por 100 del PIB». MUÑOZ CIDAD, Cándido, “Consumo y nivel de vida” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 535. Análisis complementarios en, ÁLVAREZ ÁLVAREZ, José Luis, *Los comportamientos económicos de los españoles: consumo y ahorro*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999; GIMENO ULLASTRES, Juan Antonio (coord.), *El consumo en España: un panorama general*, Madrid, Visor Dis, 2000; DÍAZ de RADA, Vidal, *Pautas de consumo y ahorro en los albores del siglo XXI*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001; y en concreto, REBOLLO AREVALO, Alfonso, *La estructura del consumo en España*, 2ª ed. amp. y rev., Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo / Instituto Nacional de Consumo, 2001. A un nivel sociológico sobre el cambio de hábitos nos remitimos el ya citado trabajo de, CASTILLO CASTILO, José, *Sociedad de consumo...*, *op.cit.*

²⁰¹ NAVARRO, Manuel, “Cambios sociales en los años ochenta” GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 677, quien aportaba los siguientes indicadores para estos años: «Baste con entresacar los siguientes datos: en los cinco años de máxima expansión económica 1986-90, el índice de disponibilidades de bienes de consumo se incrementa en un 30 por 100, el índice de ventas en grandes almacenes en más del 135 por 100 (desde 1983); el consumo de gasolina, en un 27 por 100 (en cantidad); las importaciones de bienes de consumo, un 67 por 100; la matriculación de turismos, en un 26 por 100, sobrepasando o rondando el millón por año (y el parque estimado, en un 39 por 100); las salidas fuera de España aumentan un 24 por 100; las conferencias internacionales de

Como han reconocido la mayor parte de los economistas, la capacidad interna del mercado seguía siendo limitada para satisfacer el incremento del consumo nacional. Sobre todo cuando, por ejemplo, la demanda interna llegaba al 8,3% en 1987, registrándose el mayor *pico* durante este tiempo. De este modo, si revisábamos la evolución de la balanza comercial para 1987 y 1988 observamos que mientras que las exportaciones representan un 6,5% y 7,2% sobre el PIB, las importaciones se elevan hasta el 22,5% y el 19% respectivamente para los mismos años. En esta situación se pueden observar,

«dos tendencias complementarias; de una parte, la desprotección del mercado interno que se deriva de la adhesión de España a la Unión Europea [...]. De otra, el crecimiento de la economía española en la segunda mitad de los años 1980, que produce una considerable expansión de las importaciones de productos industriales»²⁰³.

Lo cual conllevará un saldo comercial exterior del 0,1% y del -1,1% para 1987 y 1988²⁰⁴.

Así el recurso a las importaciones de bienes tanto de primera necesidad como de larga duración, tenderá a corto y medio plazo a desequilibrar una siempre maltrecha balanza de pagos²⁰⁵. Un desequilibrio que va a verse agravado ante la bajada de las exportaciones, en tanto buena parte de los bienes demandados van a estar destinados al mercado nacional²⁰⁶. Un nuevo “círculo vicioso” estaba a punto de fraguarse. Esto en una primera lectura, pues carente de una política industrial a medio plazo por parte de los gobiernos socialistas, lo que se estaba generando era un tejido productivo escasamente competitivo que a pesar de estar sostenido por el consumo interno, en realidad sus productos no podían competir en calidad y precio con el mercado internacional²⁰⁷. A este déficit debería añadirse otro no menor: por ejemplo, las 326.000 empresas que existían a finales de 1987 y “formaban el tejido industrial español el 90%

salida, un 79 por 100; las pernoctaciones de españoles en establecimientos hoteleros, un 24 por 100». *Ibíd.*, p. 678.

²⁰² Por ejemplo consúltense los *Informes de Coyuntura Económica* editados por el Ministerio de Economía y Hacienda y realizados por la Dirección General de Previsión y Coyuntura para los años 1986 y 1987. Véase lo apuntado en la *nota 164*.

²⁰³ BUESA, Mikel y MOLERO, José, “La industria: reorganización y competitividad” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, pp. 161-163.

²⁰⁴ Véanse los datos proporcionados por, VELASCO, Luis de, “La insoportable gravedad del déficit exterior”, *Información Comercial Española*, n° 676/677, (1989-1990), pp. 147-150.

²⁰⁵ Véase, REQUEIJO, Jaime, *Introducción a la Balanza de Pagos en España*, Madrid, Tecnos, 1985.

²⁰⁶ Con todo, el balance entre importaciones y exportaciones va ir modificándose con la acelerada liberalización e internacionalización de la economía. De una situación estable durante la década de los setenta, en donde prácticamente las tasas de cobertura del mercado interior cubrían cerca del 90 por ciento; a mediados de los ochenta se comienza a modificar paulatinamente esta situación de origen. «En efecto, en un marco de aumento moderado de la producción industrial interna, las importaciones experimentaron un crecimiento muy importante y las exportaciones vieron frenada su progresión anterior. El alza de las importaciones es fruto de dos tendencias complementarias; de una parte, la desprotección del mercado interno que se deriva de la adhesión de España a la Unión Europea y que supuso la apertura de oportunidades importantes para las empresas de esa área, debido al elevado nivel de protección del que partía la industria española. De otra, el crecimiento de la economía española en la segunda mitad de los años 1980, que produce una considerable expansión de las importaciones de productos industriales». BUESA, Mikel y MOLERO, José, “La industria: reorganización y competitividad” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, pp. 159-160. De notable interés también el trabajo colectivo de, JAUMANDREU, Jordi y FARIÑAS GARCÍA, José Carlos (coords.), *La empresa industrial en la década de los noventa*, Madrid, Fundación Argentería / Visor, 1999.

²⁰⁷ Para un relato desde el seno del Ejecutivo, ESPINA, Álvaro, “Diez años de política industrial”, *Leviatán*, n° 50, (1992), pp. 39-64, dentro del dossier monográfico dedicado a *La década del cambio*.

son pequeñas y medinas y distan mucho de presentar tal cuadro de eficiencia y modernidad” de la que tanto pregonaba los técnicos socialistas²⁰⁸.

Como destacó entre otros Juan Torres López no sólo es que este desequilibrio se fuera acentuando, sino que se pudo sostener mientras que la llegada de capitales extranjeros se mantuvo al ritmo de los primeros años ochenta. Un equilibrio, en todo caso, ficticio pues como ha recordado el mismo autor, los capitales que llegaban tenían un “carácter fundamentalmente especulativo y generadores de tensiones sobre el tipo de cambio de la peseta, que, a su vez, afectaba negativamente a las ya de por sí débiles exportaciones nacionales”²⁰⁹. De esta forma, se iniciará una “separación paulatina y creciente del movimiento y volumen de *los flujos financiero-especulativos* [...] respecto del movimiento correspondiente a los *procesos reales* de la economía”²¹⁰.

La apuesta por mantener unos altos tipos de interés nominal del dinero fue generando un *efecto llamada* no a los sectores productivos sino principalmente a los especulativos, los financieros, con lo que de negativo tuvo para el control de la inflación y otras tantas variables²¹¹. Como fundamentó el economista que llegaría a ser Secretario General de Hacienda (1984-1986) Juan Francisco Martín Seco muchas de las inversiones de capital extranjero en estos años,

«no se han dirigido en muchos casos a crear nuevas actividades, sino a apropiarse de las empresas ya existentes en un intento de controlar determinados sectores, beneficiándose así de las cadenas de distribución y convirtiéndose en punta de lanza para el consumo nacional de la industria extranjera. Las inversiones en inmuebles, por su parte, han desatado en un pasado reciente una ola especulativa, con incrementos desmesurados de precios y consecuencias sociales desastrosas»²¹².

Nos encontramos ante el nacimiento de la conocida “cultura del pelotazo”, a saber del posible cuando no deseable enriquecimiento rápido del que hablara consciente o no el propio

²⁰⁸ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 74; y, MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Quiebra del modelo económico español” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 137.

²⁰⁹ TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 28.

²¹⁰ ALBURQUERQUE, Francisco, “Una crítica al...”, *op.cit.*, p. 139.

²¹¹ Se calcula que el capital extranjero de *espíritu especulativo* prácticamente doblará su ‘valor’ en tan sólo un año. Entre 1986 a 1987 pasaría de 400.903 millones de pesetas a 727.279 millones de pesetas, respectivamente. Datos extraídos de, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 155. Los mismos autores indicaban más adelante: «Lo cierto es que a lo largo de 1987 el país comenzó a respirar la cultura del enriquecimiento rápido. En los diez primeros meses del año, hasta el *crash* de la Bolsa del 19 de octubre, las entradas de capital extranjero superaron los 9.000 millones de dólares, de los que unos 5.000 fueron a inversiones de cartera. La Bolsa, que en el mes de mayo marcaba el mínimo del año en 202,89 puntos, pegó un brinco hasta colocarse en 328,36 dos semanas antes del *crash*. Es decir, en el plazo de cinco meses los inversores le ganaron la friolera de un 61 por ciento a su dinero». *Ibíd.*, p. 204. Por su parte desde las filas socialistas se negaría la mayor durante todos los años ochenta: «[E]l nivel que han alcanzado los tipos de interés ha servido para que se actué con criterios muy selectivos, materializando sólo aquellos proyectos que eran verdaderamente rentables. Esta dimensión junto a su impacto antiinflacionista caracteriza su aportación positiva al proceso». COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Recuperación económica y...”, *op.cit.*, p. 16. También resulta muy gráfico el trabajo de, FERNÁNDEZ PÉREZ, Eduardo, “Evolución reciente de los tipos de interés en España y en la Comunidad Europea”, *Papeles de Economía Española*, nº 52-53, (1991), pp. 286-303. Igualmente consúltese el estudio colectivo de, GALÍ, Jordi [et al.], *La economía española: una visión diferente*, Barcelona, Antoni Bosch / CREI, 1996. Y asimismo, véase la investigación periodística en su día llevada a cabo al respecto por, DÍAZ HERRERA, José y TIJERAS, Ramón, *El dinero del...*, *op.cit.*

²¹² MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Quiebra del modelo económico español” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 137.

Solchaga²¹³. Una “cultura del pelotazo” que no puede explicarse sin la “cultura empresarial de la precariedad”. Un mundo del capital dirigido a partir de entonces por la conocida como *gente guapa* (*beautiful people*) en donde Mario Conde sería el ejemplo más definido²¹⁴. Una estrategia guiada bajo tres dogmas: bajos salarios, empleo precarios y recogida de beneficios a corto plazo²¹⁵. *Ganancias* empresariales que llegarían a límites no conocidos como se destacaría desde la UGT: “[M]ientras los salarios han tenido un comportamiento moderado –se señalaba– durante los años 1986, 1987 y 1988, los beneficios han experimentado un aumento del 365%”²¹⁶.

Una cultura de gestión de lo empresarial bastante similar a la heredada del franquismo, y que a pesar de los “vientos modernizadores”, apenas innovará tanto en la modificación de los factores productivos como en los estrictamente laborales-salariales²¹⁷. Lo que no ha evitado, por

²¹³ Las declaraciones públicas de Carlos Solchaga fueron las siguientes: «[É]ste es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa, y quizá uno de los países donde se pueda ganar más dinero de todo el mundo. Y eso no es ya que lo digamos nosotros, los que [nos] juntamos en estas mesas, o que lo diga yo, que soy ministro de Economía, es lo que dice cualquier asesor bursátil o de inversiones extranjeras que ustedes se tomen el trabajo de leer estos días». Extraído de, POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 428, nota 6. Una frase de la que el propio Solchaga se arrepentiría en no pocas ocasiones, aunque justificando el origen de sus declaraciones: «Creo, sin embargo, que lo que hubo fue un ambiente, se creó un ambiente de negocio rápido en el que todo el mundo podía obtener ganancias. Es que pasaron muchas cosas a la vez, como también pasaron en otros países en esa época». Declaraciones en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, op.cit., p. 167. Asimismo véanse las entrevista del citado político en, IGLESIAS, Mª Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 122; y MOTA, Jesús, “Entrevista con Carlos Solchaga” en JULIÁ, Santos, PRADERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la...*, op.cit., pp. 564-568. Léase también, GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Manuel J., “La empresa en la historia del pensamiento económico” en LLORDEN, Moisés (comp.), *De empresas y empresarios en la España contemporánea*, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1995, pp. 11-28.

²¹⁴ Sin duda una referencia altamente recomendable es el voluminoso trabajo de CONDE, Mario, *Memorias de un preso*, Madrid, Martínez Roca, 2009. Consúltase un reportaje que en su momento tendría cierta resonancia mediática: SAN SEGUNDO, Gonzalo, “El dinero, la nueva furia de los españoles”, *Cambio 16*, nº 872, 15 de agosto de 1988, pp. 14-19.

²¹⁵ En primer lugar véase, PRIETO, Carlos, “Políticas de mano de obra en las empresas españolas”, *Sociología del Trabajo*, nº 6, (1989), pp. 33-50. Una determinada forma de entender la vida socioeconómica con profundas consecuencias éticas y sociales en un país que, por vez primera en un largo tiempo, disfrutaba de una estabilidad política democrática y de un cierto grado de crecimiento. Una singular cultura que fue reflejada en numerosas obras literarias y periodísticas. Por ejemplo en, MOIX, Terenci, *Garras de astracán*, Barcelona, Círculo de Lectores, 1991; a análisis más crudos como los de PETRAS, James y CARROLL, Rita, *El socialismo español...*, op.cit..

²¹⁶ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al XXXV Congreso Confederal”, Madrid, 1990, sig. 0067-001, p. 16.

²¹⁷ Una visión crítica de este proceso en, SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política de...*, op.cit., cuando hablaba de la necesidad de un «remozamiento de la clase empresarial» (p. 114). E igualmente, ESTEFANÍA, Joaquín, “Cambios en la clase empresarial”, *Economistas*, vol. IV, nº 26, (1986), pp. 139-141, dentro del dossier monográfico, *España 1986: un balance*. Y en un tono más comedido: FARIÑAS, José Carlos, “La empresa española: características generales y comportamientos” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., pp. 409-430. La queja por la falta de una ‘burguesía emprendedora’ sería una constante durante todos los gobiernos socialistas: «En España se produjo, por la carencia de esa burguesía emprendedora una solución más pasiva que activa, con lo que se evidencié que existían dificultades para que acepten el funcionamiento y la disciplina de mercado quienes –como los empresarios– tenían que tomar decisiones en él». FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 143. En todo caso, debe tenerse presente las limitaciones analíticas de muchos de estos exámenes como destacó Raúl García Durán, pues en lo básico llevarían a cabo una «falsa identificación» de «renovación de la élite empresarial = racionalización

cierto, una posterior legitimación de esta *cultura* ante las siempre repetidas “bondades” del libre mercado tanto por la socialdemocracia –más allá de sus tenues y escasas críticas al respecto²¹⁸– como por parte de la derecha liberal convencional²¹⁹. Con la consecuencia añadida de que no dejaba de “ser chocante que fuera un Gobierno socialista cuando se rehabilitara y admirara la figura del empresario individual como creador de riqueza, y que entre los jóvenes se despertaran vocaciones empresariales”²²⁰. O dicho en palabras de la revista del Colegio de Economistas de Madrid, *Economistas*, se procedería a una “legitimación de la función del empresario”²²¹. Mientras tanto, el Gobierno y el Partido no dejarían de insistir –de puertas para afuera– durante todos estos años en la necesidad imperiosa de que su proyecto modernizador no sería realidad sin una reestructuración integral de la clase empresarial de este país²²². A saber la búsqueda de lo que se denominaba como el

«florecimiento de empresarios emprendedores, dispuestos a asumir riesgos y a materializar las oportunidades de inversión productiva que se han ido perfilando tanto en relación a los mercados exteriores como dentro del propio mercado español»²²³.

Aquello funcionaba. O al menos parecía funcionar a su ritmo. A pesar de que los avances de la modernización no se pudieran palpar ahí estaban: “[A]unque sea de manera

técnica». GARCÍA DURÁN, Raúl, “La lucha de clases: pragmatismo ¿para quién?” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 447.

²¹⁸ Entre otros no muy frecuentes ejemplos: «La recuperación económica, creemos, se caracteriza porque una gran parte de las energías se encaminan en un sentido adecuado de progreso y mejora, pero también las ha habido dirigidas al consumismo frívolo, a la especulación improductiva, a la exhibición, a la magnificación de lo particular y a la sumisión de todo concepto solidario». COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Recuperación económica y...”, op.cit., p. 25. O por ejemplo cuando en uno de los documentos claves del treinta y dos congreso socialista no se dejaba aprovechar la ocasión para, al mismo tiempo, que se denunciaba esta *escandalosa* situación se atacara de forma indirecta a los sindicatos: «Esa propia mejoraría de la situación económica y una cierta mentalidad de ‘dinero’ fácil y rápido, que se difundió paralelamente al período de crecimiento, se ha utilizado para explicar las reivindicaciones de algunos sectores sociales que, aunque mejoraban en su situación, no lo hacían al ritmo que deseaban, o al que suponían que lo hacían otros». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria Política y de Gestión de la CEF (1988-1990). 32º Congreso. Madrid 9-11 Nov. 1990”, Madrid, noviembre de 1990, sig. Fc 912, pp. 23-24.

²¹⁹ «[El éxito de la política económica] tiene que ver, ante todo, con la apertura de la economía española y con el predominio creciente del mercado: sólo se innova cuando se compite, de la misma forma que sólo la competencia tensa las capacidades creativas de los empresarios». GARCÍA DELGADO, José Luis, “Modernización económica y democracia en España”, *Economistas*, vol. XXII, nº 100, (2004), p. 28 dentro del dossier, *Veinte años de economía española*. Véase la contracara de este ‘discurso exultante’ en, PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, op.cit., pp. 53-ss.

²²⁰ CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, op.cit., p. 354. Resultan de enorme interés los testimonios de altos dirigentes socialistas sobre este fenómeno económico-cultural. Entre otros, véanse las declaraciones de Manuel Chaves en, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., pp. 333-334.

²²¹ Véase el contenido del número monográfico de, *Economistas*, vol. VII, ° 36, (1989), titulado *Empresas y empresarios*, con dos destacados textos: RUESGA BENITO, Santos M., “Empresas y empresarios sumergidos” (pp. 18-23); y SOLÉ MARIÑO, José Manuel, “La empresarialidad emergente: en el principio de reconversión estratégica” (pp. 24-31).

²²² «Las empresas españolas deberán experimentar considerables modificaciones, con un proceso de absorción de las menos eficientes. Las viejas empresas habrán de rejuvenecerse y otras se crearán para atender las nuevas demandas y necesidades. A cambio podrán superar –por fin– la restricción que para su dimensión y crecimiento suponía el tamaño del mercado nacional». AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 27.

²²³ AHFPI, PSOE-CE, “31º Congreso del PSOE. Informe Político. Memoria de Gestión, 1984-1987”, Madrid, enero de 1988, sig. C 659. t1, p. 8.

paulatina y no siempre perceptible, el país está modernizando extraordinariamente sus estructuras sociales y su aparato productivo”, diría el propio Carlos Solchaga un 26 de enero de 1988²²⁴. Todo ello aderezado de un *discurso economicista*, que vestido con un “ropaje abstrusamente matemático” como lo exigían las “nuevas modas científicas”²²⁵, llegaría a impregnar todo el discurso socialista: “No sólo crecemos más que antes sino que ahora lo hacemos por encima de los países de nuestro entorno”²²⁶. Un *clásico alegato* siempre repetido en tiempos de bonanza económica.

De este modo, se iría generando cierta *euforia* entre las filas socialistas –en enero de 1988 en el XXXI Congreso el PSOE se declararía como nos “podemos sentirnos orgullosos de nuestra contribución”²²⁷– durante la segunda mitad de la década de los ochenta, una vez que “la economía española pareció haber encontrado finalmente el camino del crecimiento equilibrado, lográndose una reducción simultánea de la inflación y el empleo”²²⁸. No han faltado testigos de primer orden quienes con una alegría del todo entusiasta hablarán de una *época dorada*²²⁹. Una *euforia* que conduciría a lo que Juan Francisco Martín Seco calificaría como la magnificación del momento: “Después de muchos años de crisis continuada los logros en la recuperación casi siempre tienden a magnificarse y, lo que es peor, a ligarse a determinadas políticas como causa-efecto”²³⁰.

²²⁴ Declaraciones procedentes de, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 156.

²²⁵ AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, p. 74, *nota 52*. Por su parte resulta enormemente ilustrativo una carta personal enviada por José María Maravall, y fechada el 2 de marzo de 1984, al entonces presidente de Gobierno. Texto en el que puede advertirse cierta preocupación por el empleo de un lenguaje más propio de estudios universitarios de economía que de un discurso político al uso: «[...] en un primer momento, un lenguaje del Gobierno basado en la racionalidad técnica tuvo un efecto de deslumbramiento [...]. Además de sintonizar con las aspiraciones de modernización, el Gobierno dominaba saberes crípticos [...]. Mi impresión actual es que el impacto se ha desvanecido en gran medida. El desempleo, la confrontación acerca de la reconversión, la ausencia de un pacto social, las huelgas, la inseguridad ciudadana, la cierta monotonía despolitizada del mensaje: todo eso ha desgastado la confianza en unas virtudes cuasi-taumatúrgicas [...]. El Gobierno parece considerarse el único agente económico racional [...]. Puede ser bastante verdad (y también bastante *boutade*) decir que no hay una política macroeconómica de derechas o de izquierdas. Reconocer que no hay otra alternativa representa una terrible expresión de realismo ideológico, de pragmatismo [...]. Pero entonces nos tenemos que diferenciar más en lo demás». Texto extraído de, MARAVALL, José M^a, *El control de...*, *op.cit.*, pp. 60-61. Véase, de nuevo, la crítica intervención por aquella mismas alturas de Joaquín Leguina, y que ya se ha citado en más de una ocasión. AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Sindical, Joaquín Leguina, “El discurso socialista en la encrucijada”, Madrid, octubre de 1987, sig. 002906-005. Y también consúltese lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 1*.

²²⁶ AHFPI, PSOE-CEF, “Informe de gestión al Comité Federal. Informe Político”, Madrid, 2 de octubre de 1987, sig. Fc 4009, vol. I, p. s/p. AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 35.

²²⁷ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 8.

²²⁸ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 426.

²²⁹ *Coincidencia* o mera *casualidad* dichos términos serían empleados de forma igual, primero, por, SOLCHAGA, Carlos, *El final de...*, *op.cit.*, y tiempo más tarde por, GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, *op.cit.*. No se conoce, por el momento, empleo similar de tales palabras por parte de posiciones críticas o puestos a la tarea proveniente del movimiento sindical.

²³⁰ MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Comentarios sobre la...”, *op.cit.*, p. 39. Señalando a continuación: «En la etiología económica casi todo es posible. Los hechos son irrepetibles y es difícil, por tanto, probar las relaciones causales entre las distintas variables. Todos tienden a apropiarse de los éxitos

Los tiempos del feliz equilibrio duraron lo que duraron. Aproximadamente un lustro escaso²³¹. La caída del ciclo económico mundial a partir de los noventa se comenzaría a sentir en España a la altura de finales de 1989, cuando ya en los países de la OCDE habían visto resentirse su economía un par de años antes, primero, ante el *crack* bursátil de 1987, y posteriormente por los perniciosos efectos de las políticas de ajuste impulsadas desde los años ochenta, y que confluirían en la crisis bancaria mundial de 1990, tras otro *shock* petrolífero de aquellos años²³². Una nueva crisis que evidenciaría todas las debilidades de la vía de desarrollo elegida²³³.

Lo anterior, con dos lecturas añadidas. Primero que aquella *crisis* sobrepasaba la mera etiqueta de *coyuntural*. En palabras de Francisco Alburquerque: “quizás ya no sea cierto afirmar que el simple crecimiento económico lleve consigo similares efectos de absorción de empleo y de avance hacia el desarrollo como en el periodo anterior”²³⁴. Segundo, tanto por parte de los máximos responsables del Gobierno como por parte de los agentes sociales como por buena parte de la ciudadanía, se generaría la “sensación colectiva” de que no se aprovecharon aquellos años, de cara a consolidar un proceso de crecimiento económico bajo otras bases más firmes²³⁵.

para justificar determinadas medidas en consonancia con sus ideologías o posicionamiento político y achacan los fracasos o bien a no haber aplicado suficientemente la teoría en toda su pureza o a fuerzas extrañas e imposibles de controlar. [...]. Por eso, y por mucho que se empeñen los economistas, en la mayoría de los casos las proposiciones económicas tienen poco de carácter científico en el sentido de causa-efecto y mucho más de [...] opinión política». *Ibidem*, p. 40.

²³¹ Una visión en torno a los efectos positivos del siempre buscado ‘círculo virtuoso de la economía’ en, COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Recuperación económica y..., *op.cit.*... De los mismo autores un año antes, *id.*, “Situación, interpretaciones y..., *op.cit.*... Véase también en esta línea, SEVILLA SEGURA, Jorge, “La izquierda y el crecimiento económico”, *Sistema*, nº 97, (1990), pp. 29-40; y en concreto el trabajo de quien fuera Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, MARAVALL, Fernando, *Economía y política industrial en España*, Madrid, Pirámide, 1987.

²³² Un importante punto de inflexión como destacaría Jesús Albarraçín: «Por otra parte, el crash de la bolsa en octubre de 1987 y la evolución de la economía de los principales países industriales, muestran las contradicciones que ha acumulado el sistema económico mundial y los nuevos datos sobre la evolución de esas economías indican que una nueva recesión apunta en el horizonte». ALBARRACÍN, Jesús, “La política económica y el empleo” en *id.* (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, p. 145. Sobre la crisis económica internacional de mediados de los ochenta entre la abundante bibliografía: O’CONNOR, James, *Crisis de acumulación*, Barcelona, Península, 1987; BOSE, Mihir, *The Crash: the fundamental flaws which caused the 1987-8 world stock market slump and what they mean for future financial stability*, London, Bloomsbury, 1988; GUNDER FRANK, André, *El desafío de la crisis*, Madrid, IEPALA, 1988; REMSHAW, Geoffrey, *Reajuste y comportamiento de la economía en los países industrializados. Una síntesis*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990; o, FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón, *La explosión del desorden: la metrópoli como espacio de la crisis global*, Madrid, Fundamentos, 1993. Por último no deje de consultarse las valoraciones, conclusiones y recomendaciones finales de, OECD, *Economy in Transition. Structural Adjustment in OECD Countries*, Paris, OECD, 1989.

²³³ Véase la lectura realizada en aquel momento por el Secretario de Estado de Economía, DEHESA, Guillermo de la, “Los límites de la política económica española”, *Leviatán*, nº 32, (1989), pp. 27-37; y, por otro lado, por quien fuera Secretario de Estado de Hacienda (1991-1993), ZABALZA, Antonio, “La recesión de..., *op.cit.*...

²³⁴ ALBURQUERQUE, Francisco, “Una crítica al..., *op.cit.*, p. 134.

²³⁵ «Ciclo también en parte malogrado: no se aprovecharon todas las oportunidades que entonces se tienen para emprender las reformas precisas en la estructura productiva española, con un sector industrial fuertemente perjudicado por el cambio sobrepreciado de la peseta hasta las forzadas devaluaciones de 1992; no se consigue detener, desde la huelga general de diciembre de 1988, una creciente tensión social, y sobre todo, no se acierta a combatir deplorables comportamientos con proyección pública, ayunos de esa ética que cimenta la cohesión social y la credibilidad del sistema de libertades». GARCÍA DELGADO, José Luis y JIMÉNEZ, Juan Carlos, “El proceso de modernización económica: perspectiva histórica y comparada” en *id.* (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 24.

Asimismo las respuestas ofrecidas por parte del socialismo evidenciarían un vacío teórico que mostraría, en resumidas cuentas, la escasa consistencia que había tras aquello de la única policía posible, como se podía visualizar en el repertorio de las insuficiencias del modelo de crecimiento elegido²³⁶. Años más tarde se hablara de la “oportunidad perdida” o directamente de ciclo “malogrado”²³⁷.

Con ciclo a favor o sin ciclo económico adverso, lo que resultó también evidente es que el “impulso reformador” de la primera década de los ochenta no tuvo su continuación, precisamente, cuando las posibilidades presupuestarias habían podido posibilitar corregir no pocos de los desequilibrios citados²³⁸. De hecho, el ahorro público que crecería a una media del 3% anual en estos años, producto de la lucha contra la inflación, el déficit público y del incremento de la presión fiscal, continuó contribuyendo en lo fundamental a la mejora de las condiciones del propio ahorro empresarial que alcanzaría cifras desconocidas²³⁹.

Así la configuración del *stock nacional de capital público* se dirigió, en lo básico, a la creación de un ambicioso programa de inversiones en infraestructuras que crecería “de forma sostenida a partir de los PGE de 1988, a un ritmo de medio punto del PIB cada año, hasta

²³⁶ Enormemente significativo, en este caso, serían las propuestas elaboradoras durante un largo tiempo por el PSOE a través de la ‘frustrada’ Comisión del Programa 2000 y en donde se llegaría a describir un complicado contexto sin más alternativas reales que las políticas practicadas hasta ese momento por el propio Gobierno socialista. Todo ello a pesar del *giro socialdemócrata* que se trataría de ensayar en aquella ocasión: COMISIÓN PROGRAMA 2000, *La economía española...*, op.cit., y en concreto, “Capítulo IX. Crecimiento económico en los años 90”, pp. 133-142. Véase al respecto lo apuntado en, “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

²³⁷ Entrevista de Carlos Solchaga en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, op.cit., p. 164. Para la segunda expresión, GARCÍA DELGADO, José Luis y JIMÉNEZ, Juan Carlos, “El proceso de modernización económica: perspectiva histórica y comparada” en id. (dir.), *España, economía...*, op.cit., p. 24. Por su parte Alberto Montero señalaría: «La persistencia de tales desequilibrios constituye la principal evidencia de la ausencia de reformas estructurales y políticas de ajuste activo. El periodo de crecimiento económico se había cerrado dejando a la economía sin una base consolidada y sin la posibilidad de contar con un mínimo margen para la articulación de medidas contracíclicas de ajuste a los tiempos de crisis que se avecinaban, tanto más patentes cuanto que ya habían comenzado a afectar a Europa y al resto de países desarrollados». MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, op.cit., p. 143. En la misma línea se expresaría Miren Etxezarreta: «Se ha perdido una oportunidad extraordinariamente importante de haber intentado un enfoque distinto, basado en un diseño socio-económico autónomo, que supiera aprovechar las oportunidades que la integración en el exterior pudiera brindarnos, modernizar todo el país y mejorar su base material, sin renunciar por ello al objetivo de una sociedad más justa. La experiencia de los ochenta ha supuesto la profunda desilusión de muchos que esperaban otra cosa de una sociedad con una administración socialista y ha demostrado las profundas dificultades de planteamientos distintos en el capitalismo. Se ha dilapidado una oportunidad histórica [...]. El balance no parece demasiado brillante». ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 89.

²³⁸ Desequilibrios que rara vez serían reconocidos por la propia organización socialista, hablándose a lo sumo de desviaciones u otros términos similares: «Este mayor crecimiento económico ha sido posible sin desequilibrios de las grandes macromagnitudes. Por el contrario, éstas han continuado su mejora». AHFPI, PSOE-CE, “31º Congreso del PSOE. Informe Político. Memoria de Gestión, 1984-1987”, Madrid, enero de 1988, sig. C 659. t1, p. 8.

²³⁹ Durante los años anteriores a la llegada de los socialistas la tasa de ahorro nacional caería del 21 por ciento de la renta nacional disponible en 1979 al 17,8 por ciento dos años después. FUENTES QUINTANA, Enrique y REQUEIJO, Jaime, “La larga marcha...”, op.cit., p. 28. Otros datos a tener en cuenta en, VILLORIA, Valentín T. y FERNÁNDEZ ALVAREZ, Ana Isabel, “Evolución de los excedentes empresariales”, *Papeles de Economía Española*, nº 52-53, (1991), pp. 315-330; y, SALAS FUMÁS, Vicente y GALVE GÓRRIZ, Carmen, “Propiedad y resultados de la gran empresa española”, *Investigaciones Económicas*, vol. XVII, nº 2, (1993), 207-238. Y asimismo, RAYMOND, José Luis, “El ahorro en la economía española”, *Papeles de Economía Española*, nº 47, (1992), pp. 155-172.

situarse por encima del 5 por ciento del PIB en 1991”²⁴⁰. Como ha recordado Carles Boix el objetivo del Gobierno se encaminó a mejorar la posición de la economía nacional con respecto al “mercado europeo, mejorar la productividad general y ofrecer más incentivos a la inversión privada”²⁴¹. Una opción política muy concreta que tendría en la apuesta por la construcción del AVE su máximo exponente, en detrimento de otras posibles políticas de cara al sector empresarial público, o, simplemente, en relación a políticas sociales de carácter redistributivo²⁴².

Asimismo no se aprovecharán en estos años de forma suficiente y adecuada el *tirón económico* en un ámbito que devendrá en central en pocos años: la innovación tecnológica, el conocido I+D. En una sociedad y sobre todo en una economía en rápida transición, a pesar del esfuerzo creciente presupuestario del Gobierno en esta materia, junto con los *informes y programas* que lo sustentaron²⁴³, el “*ratio* de esfuerzo tecnológico español supone un 49 por 100 de la que tienen, en media, los países de la UE y un 34 por 100 de la que registra Estados Unidos”²⁴⁴. Con ser grave esta situación diferencial como subrayó Carmela Martín, el principal

²⁴⁰ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 198. Añadiendo: «La creciente apertura de la economía española y, en particular, el proceso de integración en la Comunidad Europea desde 1986 acabaron de reforzar el compromiso del gobierno y del PSOE con el objetivo de asegurar la competitividad de la economía española mediante una inflación baja, unos agregados macroeconómicos equilibrados y reformas estructurales en el mercado doméstico». *Ibídem*, p. 178.

²⁴¹ *Ibídem*, p. 198.

²⁴² Para esta toda etapa consúltese, primero, el trabajo ‘oficial/partidista’ de, SÁENZ de COSCULLUELA, Javier, “Las obras públicas. Las infraestructuras” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, pp. 275-295. Así como los datos aportados por, PÉREZ GARCÍA, Francisco, “Inversión en infraestructuras y convergencia de las regiones españolas”, *Economistas*, vol. X, nº 54, (1992), pp. 84-90. No obstante, los datos más contundentes lo proporcionaron José Díaz Herrera e Isabel Durán cuando indicaban como del presupuesto inicial aprobado un 7 de julio de 1989 en 262.500 millones de pesetas, a su conclusión costaría 473.000 millones de pesetas. Un caso que, además, llevaría la imputación de una larga lista de cargos socialistas y las muy extendidas sospechas de todo tipo de corrupción: política, económica y personal. HERRERA, José y DURÁN, Isabel, “AVE: el que no corre vuela” en *Pacto de silencio...*, *op.cit.*, pp. 199-225.

²⁴³ Entre los informes más serios y con mayor profundidad impulsados por el Gobierno en este tiempo ha de destacarse el de, CASTELLS, Manuel [et al.], *Nuevas tecnologías, economía y sociedad en España*, II vols., Madrid, Alianza, 1986, con prólogo de Felipe González; así como el, CASTILLO, Juan José (comp.), *La automatización y el futuro del trabajo. Tecnologías, organización y condiciones de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, Por su parte consúltese también el estudio de los años ochenta de, BRAÑA, Javier, BUESA, Mikel y MOLERO, José, *El Estado y el cambio tecnológico en la industrialización tardía. Un análisis del caso español*, Madrid / México, Fondo de Cultura Económica, 1984. Una visión radicalmente diferente en, BAYLOS, Antonio [et al.], *Nuevas tecnologías y...*, *op.cit.*, y en concreto los trabajos contenidos en el apartado: “III. Condiciones sociales y de trabajo”, entre los que han de resaltarse lo de, MIGUÉLEZ, Faustino, “Nuevas tecnologías, clase trabajadora y contrato social” (pp. 141-148); y, CASTILLO, Juan José, “Nuevas tecnologías y condiciones de trabajo” (pp. 149-166)

²⁴⁴ MARTÍN GONZÁLEZ, Carmela, “La situación tecnológica: cambio técnico y política tecnológica” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 363. La propia autora aporta un conjunto de datos que resultan relevantes, de cara a acercarnos al esfuerzo inversor en dicha materia durante la época socialista. Así en el “Cuadro 1. Gastos totales en investigación y desarrollo (I+D), 1986-1997” (p. 362) construido a partir de la *Estadística sobre las Actividades en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico* del INE presenta tres variables: primero, los miles de euros en Gastos I+D; segundo, los índices en términos constantes en donde 1986 tendría un valor de cien; y tercero el Esfuerzo Investigador [Gastos I+D / PIB a pm (%)]. Los datos para 1986, 1989 y 1992 son los siguientes: 1.438.062 / 100/ 0,61; 2.601.978 /144/ 0,75; 4.073.938 / 186/ 091, respectivamente. Y, de hecho, 1992 es el año con mayor inversión durante estos años, pero es que incluso siendo esto así dicha cifra se queda a prácticamente un punto por debajo de la media de la UE y un punto y medio por debajo de los Estados Unidos. Con razón la autora concluye de la siguiente manera: «La insuficiencia de nuestro sistema de ciencia y tecnología se hace más evidente si se repara en que el desnivel que muestra España en términos de I+D es muy superior al que corresponde a su posición económica». *Ibídem*, p. 362.

problema se “manifiesta de una forma especialmente intensa en el seno de las empresas, pues su participación relativa tanto en la financiación como en la ejercicio del conjunto de la I+D es mucho menor en España”²⁴⁵. Queda así constatado otra de las insuficiencias y debilidades del modelo productivo naciente.

De este modo, no sólo se va errar en las previsiones siempre *optimistas*²⁴⁶ sino que la “inactividad gubernamental en la ejecución de reformas estructurales” va a ser otra de las notas características de estos años²⁴⁷. Con razón ha sido calificada esta política como una “huida hacia delante que culminó en una profunda crisis monetaria y económica”²⁴⁸.

Mientras tanto esto no sería obstáculo alguno para reclamar un “nuevo consenso [...] y [una] nueva credibilidad”²⁴⁹ cuando la falta de acuerdo con los agentes sociales, una vez rota la *concertación social*, llevaría a que la conflictividad laboral se incrementará tan sólo en 1987 un 212% con respecto al año anterior²⁵⁰. Una fecha no casual, en tanto el periodo de vigencia del

²⁴⁵ Ibídem. Añadiendo: «La situación de atraso de las empresas españolas es más acusada, precisamente, en las ramas intensivas en tecnología, que, por lo demás, son las que se caracterizan por tener una demanda más dinámica. El hecho de que buena parte de las ramas de actividad donde el desnivel en el esfuerzo tecnológico de España es mayor sean las que producen maquinaria y bienes de equipo plantea una problemática adicional con vistas a la asimilación de las tecnologías que estos bienes incorporan (cambio técnico incorporado)». Ibídem, p. 365. Por lo demás, consúltese, entre otros, el balance de: MAS, Matilde y QUESADA, Javier (dirs.), *Las nuevas tecnologías y el crecimiento económico en España*, Bilbao, Fundación BBVA, 2005.

²⁴⁶ Por ejemplo véase el caso concreto de, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN Y COYUNTURA, *Balance y perspectivas de la economía española: informe económico y financiero del Proyecto de Presupuestos Generales de 1987*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Previsión y Coyuntura, 1986. Por, lo demás véase lo apuntado previamente en la *nota 164*.

²⁴⁷ TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 31.

²⁴⁸ ALBEROLA ILA, Enrique, “La europeización de la política macroeconómica” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, *op.cit.*, p. 344.

²⁴⁹ COLLADO, Juan Carlos Y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Recuperación económica y...”, *op.cit.*, p. 27. Por su parte Álvaro Espina criticaría duramente la posición de los agentes sociales. En concreto la estrategia de los sindicatos por su supuesta responsabilidad en la falta de concertación social: «La conclusión que puede extraerse del curso de los acontecimientos en el escenario socio-laboral del último trienio es que, en ausencia de un clima que permita a los interlocutores sociales establecer un cierto intercambio político con el gobierno, no vale la pena empeñarse en prolongar la política de rentas concertadas. Frente a ello, parece preferible dejar que se imponga por sí sola la evidencia de que sin una política salarial responsable por parte de los agentes sociales es mucho lo que unos y otros tienen que perder en términos de empleo y de competitividad». ESPINA, Álvaro, “Diez años en la vida de España. Las políticas laborales y de empleo” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 462.

²⁵⁰ ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE, Rafael, “La política económica...”, *op.cit.*, p. 13. A diferencia de lo que había sucedido en 1984 cuando no se llegaría a firmar ningún tipo de acuerdo interconfederal –el AES tendría otra dimensión– la ruptura de las negociaciones en 1987 adquirirían, a corto plazo, un significado político-social bien distinto. Si tres años antes el PSOE y el Gobierno socialista todavía podían contar para su proyecto político-económico con la fuerza legitimadora obtenida tanto de las elecciones generales de 1982 como de las municipales de mayo de 1983; el panorama posterior se había modificado sustancialmente por los hechos y acontecimientos ya reseñados. Si 1984 sería un año de importantes y notables conflictos, principalmente, obreros, los mismos quedarían enmarcados finalmente como un repunte aislado de conflictividad; todo lo contrario que en el ochenta y siete cuando se asiste al surgimiento de un nuevo y fuerte ciclo conflictivo que no sólo atañe al proceso de desindustrialización, sino que se extiende por otros frentes, principalmente, el estudiantil. Todo lo cual sería resumido por Carles Boix de la siguiente forma: «The government appeared uncompromising. Veering away from what, to that date, had been a predominant pattern of wage

malogrado AES llegaba había terminado. Todo un punto de inflexión con dos vertientes principales. Primero en relación a las por sí debilitadas relaciones entre PSOE-UGT. Por parte de la central sindical se hablaría –por vez primera desde la llegada del PSOE al Gobierno– de un “rotundo fracaso en la estrategia trazada por el gobierno”²⁵¹. Y segundo, el inicio de la generación de un fuerte periodo conflictivo con claro matiz obrero. Pues como de nuevo destacaría la propia UGT “es hora de pensar también en los trabajadores”²⁵². En suma, se está ante la antesala de lo que, en breve, se conocerá como la propuesta sindical del *giro social*²⁵³.

De inmediato, el transcurrir económico se va a complicar enormemente. Más pronto o más tarde, voces autorizadas del Ministerio de Economía Hacienda, diversos ministros, técnicos, todos ellos con el apoyo absoluto de la organización, empezarán a hablar de un *recalentamiento* excesivo de la economía. Nueva doctrina, nueva tesis, inclusive un nuevo lenguaje técnico antes que político, de cara a profundizar en la línea económica seguida hasta el momento²⁵⁴. Y es que la *hipótesis* de un excesivo y acelerado crecimiento que estaba poniendo en serios apuros a los por sí sensibles equilibrios macroeconómicos, se convertirá en la tónica discursiva dominante en los dos siguientes años. A partir de donde se llevarían a cabo políticas de ajuste “carentes de toda intención discriminatoria” con el fin de “enfriar” la economía ante las altas de consumo, derivadas de los *records* en el ahorro empresarial y familiar²⁵⁵.

Los problemas no son desconocidos como desconocidas no van a ser las medidas a adoptar. Entre los problemas se encontraba la subida de la inflación y el incremento del déficit público, pero sobre todo un déficit comercial situado en el 7,3% del PIB, lo que “colocaba a España en el primer lugar mundial” en tal materia y en el cuarto lugar como “país vendedor de empresas en el mundo”²⁵⁶. En el diagnóstico que ofrecerán los socialistas se considera que,

moderation, threatened the anti-inflationary policy in course. Furthermore, in the wake of a recovery in fiscal revenues, the reduction of the public deficit to increase the level of national savings and investment had priority over a boost of public consumption and social transfers. Negotiations quickly became sour and a national collective agreement for 1987 turned out to be impossible». BOIX, Carles, “Building a socialdemocratic...”, *op.cit.*, p. 26. Sobre todas estas cuestiones se volverá con detenimiento en “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

²⁵¹ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al III Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 9 y 10 de octubre de 1987, sig.ant. A/37/42, p. 3. Como destacaría Charles Powell desde un claro punto de vista: «Convencidos de que su proximidad al gobierno les había perjudicado, los dirigentes ugestistas se aprestaron a dar por concluida su colaboración con éste so pretexto de que la concertación sindical de 1985-1986 había dado lugar a una reducción de los salarios de casi un punto, sin que el desempleo hubiese disminuido apreciablemente». POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 428.

²⁵² AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al III Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 9 y 10 de octubre de 1987, sig.ant. A/47/32 p. 7.

²⁵³ De hecho, entre 1987 y 1988 por parte de la central ugetista, se iría perfilando la idea-fuerza del *giro social*, que suponía a su vez romper con todo un pasado reciente pero también histórico Véase, por ejemplo, lo expuesto en, AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al IV Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 22 y 23 de abril de 1988, sig.ant. B/53/35, pp. 29 y 30, respectivamente.

²⁵⁴ Muy significativo sería la publicación del, Editorial, “Enfriar la economía”, *El País*, 11 de diciembre de 1988.

²⁵⁵ Al respecto consúltese, TORRES LÓPEZ, Juan, “Enfriar la economía o recalentar la ideología”, *El País*, 1 de junio de 1989. Asimismo véase, GARRIDO, Antoni, “Ahorro e inversión: determinantes y financiación” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, pp. 507-525.

²⁵⁶ MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, pp. 139-140; y, ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 54, respectivamente. Por su parte, José Luis Malo de Molina remarcó como la «concatenación de una elevada absorción interna con un deterioro de la competitividad [...]»

«la insuficiente moderación salarial se ha traducido, vía costes, en un crecimiento de los precios, paralelamente esos mismos altos salarios reales estarían detrás del fuerte crecimiento del consumo experimentado en el último quinquenio, que habría tenido como efecto derivado un crecimiento insuficiente del ahorro, contribuyendo además al crecimiento del déficit exterior»²⁵⁷.

Culpabilizándose, por enésima vez, a los salarios y asalariados de cualquier desviación o problema económica. Así entre las medidas adoptadas en esta primera pre-etapa de la nueva política de ajuste –como preámbulo de lo que sucederá en los siguientes años– tendente a “enfriar/desacelerar” la economía, aunque no faltaron las sorpresas tampoco se proyectaron soluciones alternativas de otro cariz económico o cuando menos más flexibles. Si las sorpresas vinieron, por ejemplo, con la decisión del Gobierno socialista de renunciar “a pronosticar la inflación prevista en años posteriores” a 1989²⁵⁸, lo que afectaría gravemente a la negociación colectiva, y rompiéndose así con una política que procedía, ni más ni menos, que desde los tiempos de los Pactos de la Moncloa²⁵⁹; la continuidad llegaría por el lado de contener la

llevaron a un aumento considerable del déficit comercial, que alcanzó un nivel medio del 5,6% del PIB con un máximo del 6,9% en 1989. Empeoramiento que se manifestó en un cambio del saldo excedentario de la balanza de pagos en déficit crecientes a partir de 1987, que llevaron a unas necesidades de financiación de la nación en torno al 3% del PIB entre 1989 y 1992». MALO de MOLINA, José Luis, “Una visión macroeconómica..., *op.cit.*, pp. 27-29.

²⁵⁷ ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO LLORENTE, Rafael, “La política económica..., *op.cit.*, pp. 20-21. Y continuaban los autores indicando: «Ante tal diagnóstico la respuesta de política económica es obvia: una reducción de los costes laborales unitarios reales que repercutirían favorablemente sobre la inflación, ayudaría a solventar el déficit exterior [...] y liberaría recursos para el ahorro en la medida en que la propensión a ahorrar de los receptores de rentas de trabajo sea menor que la propensión a ahorrar los receptores de las rentas de capital. Todo ello permitiría la reducción del tipo de interés [...] y la recuperación de la inversión en un marco de crecimiento sostenido ‘sano’». Concluyendo unas páginas adelante: «[Q]ue la moderación salarial se traduzca en disminuciones en el consumo y paralelos aumentos en el ahorro que hagan caer de forma natural los tipo de interés remite a un pensamiento económico decimonónico –Ley de Say– en la medida que supone el mantenimiento de un nivel de producción estable que, o bien se consume o bien se ahorra». *Ibidem*, pp. 21 y 23, respectivamente.

²⁵⁸ MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 140. Téngase presente que desde los Pactos de la Moncloa se había modificado la base de la política salarial oficial, en el perseguido objetivo de la moderación salarial, pasándose del cálculo de la ‘inflación real’ a la ‘inflación prevista’. Por otro lado, el economista Luis Gámir añadiría con precisión: «Por otra parte, la falta de credibilidad del objetivo de inflación del Gobierno [...] desmanteló uno de los pilares de la política de rentas. No se hizo un esfuerzo suficiente en pactar –si era necesario– la inflación esperada y devolver credibilidad». GÁMIR, Luis, “Realidad y política económica socialista: una interpretación” en RUPÉREZ, Javier y MORO, Carlos (eds.), *El Decenio de González*, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia / Encuentro, 1992, p. 179. Véase al respecto el apartado “9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. *Los arduos inicios de la flexibilización* (octubre 1976-marzo 1980)”.

²⁵⁹ No debe subestimarse en forma alguna esta importante decisión pues la negociación colectiva constituye «el mecanismo mediante el que se incorpora la inflación a los costes laborales». ALBARRACÍN, Jesús, “La política económica y el empleo” en *id.* (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, p. 148. En todo caso, resulta necesario consultar los primeros resultados de tal decisión en el informe anual de que publicaría el Ministerio de Economía y Hacienda de 1990: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA, *La negociación colectiva en las grandes empresas: principales características económicas*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Política Económica, 1991, bajo la dirección de Valeriano MUÑOZ. Junto con la bibliografía apuntada en el apartado “2.2.3. Estudios y aproximaciones a la concertación social la negociación colectiva, la política de rentas y las reformas del mercado de trabajo”, véanse sus principales resultados en el apartado “8.2.1. La «obsesión enfermiza»”.

cuestión salarial y desactivar el crecimiento de la demanda interna por la vía de reducir la inversión²⁶⁰.

¿Cómo se concretaron aquellas políticas tras calificar al crecimiento años anteriores como “insano”²⁶¹? En primer lugar, el recurso de la política monetaria ortodoxa antiinflacionista, vía contención del crédito. Una política que, a la postre, resultaría determinante²⁶². Tras los titubeos iniciales y vistas las consecuencias del *crack* bursátil del ochenta y siete, se optó por subir los tipos nominales de interés a corto plazo hasta el 15% con el fin de reducir la masa monetaria disponible²⁶³. En segundo lugar, las “necesarias” políticas de ajuste con las que afrontar la requerida desaceleración económica, se intensificarán por la vía de contener la demanda interna a través de la reducción de la inversión. Por este camino se puede observar una vez más el papel que se atribuye al Estado en su papel de intervencionista en la economía “por el lado de la oferta basada en atribuir al sector público un papel clave en la provisión y asignación de factores productivos”²⁶⁴. Estamos pues, ante lo que James O'Connor denominaría como las “funciones de acumulación”²⁶⁵.

²⁶⁰ Como se resaltaría en un duro informe la UGT: «El problema real actual de la economía española no está en el poder adquisitivo de los trabajadores». Para a continuación indicar como «es importante que el Gobierno asuma sus responsabilidades y errores y no escoja pretextos como el cacareado ‘recalentamiento’. Los desequilibrios renacientes y el manteniendo del peor de todos, el paro, cae bajo la responsabilidad de unas políticas económicas equivocadas y el fomento de un modelo de crecimiento insolidario, desvertebrador, incontrolado y plenamente liberal. Esa realidad es la que nos ha traído a la situación presente y no otra». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al VII Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 13 y 14 de noviembre de 1989, sig.ant. B/55/04, p. 8.

²⁶¹ ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO LLORENTE, Rafael, “La política económica..., *op.cit.*, p. 20.

²⁶² MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara..., op.cit.*, p. 138. Como bien destacó Enrique Alberola: «Las altas diferencias de interés con Europa, unido al atractivo inversor de nuestro país en aquel momento, propiciaron la entrada masiva de capitales, creando fuertes tensiones apreciadoras sobre la peseta. Ante la inconveniencia de subir más los tipos para enfriar la economía, se optó por imponer controles de capitales, lo que supuso una regresión en el proceso de liberalización financiera. En todo caso, en un contexto de alta movilidad de capital, los mercados encuentran fácilmente los medios para burlar tales controles, y los flujos de capitales volvían a crear tensiones monetarias y sobre el tipo de cambio a principios del año 1989». ALBEROLA ILA, Enrique, “La europeización de la política macroeconómica” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del..., op.cit.*, p. 343.

²⁶³ «La política monetaria pasó a sustentar en solitario la estrategia macroeconómica deflacionista del gobierno socialista». BOIX, Carles, *Partidos políticos..., op.cit.*, p. 227. Igualmente, MALO de MOLINA, José Luis y PÉREZ FERNÁNDEZ, José, “La política monetaria española en la transición hacia la unión monetaria europea”, *Papeles de Economía Española*, nº 43, (1990), pp. 31-51. Para una evolución global tanto de los tipos de interés a corto como a largo plazo, consúltese las tablas ofrecidas por, DEHESA, Guillermo, “Balance de la economía..., *op.cit.*, pp. 62-63. En todo caso sobre esta cuestión se volverá a hablar en este mismo en el apartado “8.2. En busca del «mana»: las vías de la internacionalización de la economía española”.

²⁶⁴ BOIX, Carles, *Partidos políticos..., op.cit.*, p. 176. Una cuestión asumida plenamente por la propia organización socialista: «Si el dinamismo del sector privado no le hubiera acompañado la actuación procíclica del sector público aquel se hubiera encontrado pronto paralizado. Habría chocado con costes crecientes en su funcionamiento por la falta de medios de comunicación, de transporte, de carreteras, que hubieran impedido o reducido los rendimientos de su actividad hasta niveles en los que habría que haber reconsiderado lo que se estaba invirtiendo, produciendo y contratando». AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, pp. 22. Pero inclusive si iría más allá, pues en ese marco de comparación que desde el PSOE se realizaría permanentemente entre el neoliberalismo de los países anglosajones y su ‘salida progresista a la crisis’ –véase en el Capítulo 6, *nota* 233– se llegaría a matizar lo siguiente: «Pero la ideología del Estado mínimo no es compatible con las exigencias de una sociedad desarrollada [...]. Igualmente, sin intervención del Estado e inversión pública, especialmente en

A lo anterior se sumaba una peseta enormemente sobrevalorada en el momento en que España decidía voluntaria y tempranamente incorporarse en el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC) del Sistema Monetario Europeo (SME) en junio de 1989²⁶⁶. Una decisión arriesgada y en gran medida motivada por cuestiones de imagen política que por cuestiones de propia necesidad económica²⁶⁷. Pues en un panorama de menguada productividad de la industria nacional, aquella decisión llevaría a incrementar, de forma notable, los costes de las exportaciones²⁶⁸.

Rechazadas posibles políticas expansivas, la opción por “mejorar el nivel de competitividad nacional” continuaría girando en el “logro de una baja tasa de inflación”²⁶⁹. Un

infraestructuras, pueden desaparecer las condiciones para la inversión privada, y por tanto para el buen funcionamiento del mercado». AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 33º Congreso del PSOE: Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo 1994, sig. Fc 1381, p. 15.

²⁶⁵ O’CONNOR, James, *La crisis fiscal del estado*, Barcelona, Ediciones 62, 1981. O como explicarían Fernando Esteve y Rafael Mora: «La tarea de la política presupuestaria no acaba en la política de rentas. Así, mediante la orientación de los gastos hace lo que se conoce como funciones de acumulación [...]: infraestructura, investigación y desarrollo, reestructuración y saneamiento de empresas (luego devueltas al sector privado), etc.; el Estado facilitaría las posibilidades de crecimiento de la rentabilidad empresarial en la medida que se socializan los costes de la provisión de ese conjunto de actividades generadoras de efectos externos, positivos para las empresas. En suma, y contando con ambas vías (ingresos y gastos), la actuación estatal se traduciría en la redistribución a favor de beneficios, siempre con la creencia de que tal crecimiento de los excedentes empresariales acabaría en incremento de la inversión privada». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, p. 44.

²⁶⁶ Sobre este proceso resultaron muy ilustrativas muchas de las aportaciones al dossier monográfico de *Información Comercial Española*, nº 657, (1988), titulado precisamente, *España y el Sistema Monetario Europeo*. A resaltarse, sin mayores contratiempos, tres trabajos: MARTÍNEZ AREVALO, Luis, “El Sistema Monetario Europeo: una visión de política económica” (pp. 56-62); FERNÁNDEZ, Vicente Javier, “Liberalización económica, credibilidad y entrada en el Sistema Monetario Europeo” (pp. 127-136); y, DEHESA, Guillermo de la, “La integración de la peseta en el Sistema Monetario Europeo: el gran dilema de la política económica española” (pp. 141-148). Una contravisión a todo lo anterior en, ARRIZABALO MONTORO, Xavier, “El ajuste en la Unión Europea durante los años noventa: los acuerdos de Maastricht” en id. (ed.), *Crisis y ajuste..., op.cit.*, pp. 137-180. Una sintética visión de conjunto en, GONZÁLEZ, Sara y MASCAREÑAS, Juan, *El sistema monetario europeo*, Madrid, UDEMA, 1993.

²⁶⁷ En relación a los argumentos institucionales el retrato de Álvaro Espina puede resultar ilustrador: «No faltaron voces entonces que imputaron a la decisión de integración en el SME la causa de nuestro males y pudieron matar al mensajero, cuando en realidad la nueva disciplina no es más que el instrumento por medio del cual se transmite al conjunto del sistema la exigencia de adaptar el comportamiento de los operadores económicos y los agentes sociales a las nuevas circunstancias, que no son otras que la aparición del mercado europeo. El avance hacia el sistema de tipos de cambios fijos resulta tan inevitable como conveniente por múltiples razones, entre otras para despejar incertidumbres de inestabilidad monetaria en quienes toman decisiones de inversión productiva a largo plazo, frente a las colocaciones financieras meramente especulativas». ESPINA, Álvaro, “Diez años en la vida de España. Las políticas laborales y de empleo” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del..., op.cit.*, p. 461.

²⁶⁸ A la hora de la integración, de nuevo, se operó con la mayor opacidad gubernamental como crítico en su día Miren Etxezarreta: «[L]a falta absoluta de debate social frente a una decisión que implica una profunda transformación de toda la vida económica, que determina un alto grado la conducción de la política económica y limita los instrumentos al alcance de las autoridades nacionales para lograr los objetivos internos». ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del..., op.cit.*, p. 65.

²⁶⁹ BOIX, Carles, *Partidos políticos..., op.cit.*, p. 179. El propio autor ha señalado como a través de esta «estrategia de deflación gradual [...] era evidente para el gobierno socialista que la combinación de tipos de cambio fijos y la eliminación progresiva de todas las barreras a los movimientos de capital lleva

difícil equilibrio todavía más complicado tras la incorporación al SME. Una decisión que, a pesar de haber sido calificada como la “única solución”²⁷⁰, sería criticada por *expertos* tan pocos sospechosos como Luis Ángel Rojo, quien al respecto señalaría sus importantes costes:

«Los hechos mostraron, sin embargo, que ni la incorporación a un sistema cambiario de aquellas características aseguraba la práctica de una política económica interior de mayor estabilidad, ni la peseta dejaría de registrar presiones alcistas mientras se mantuviera la inadecuada combinación existente de la política monetaria y la política presupuestaria y los mercados continuaran viviendo bajo el espejismo (pasajero) de que las monedas del mecanismo de cambio del sistema podrían pasar a la Unión Monetaria en un proceso sin traumas»²⁷¹.

También se continuó con la progresiva liberalización del mercado con medidas tan trascendentales como que el INI en 1989 pasará a depender de la legislación mercantil común, convirtiéndose en una corporación de derecho público sujeta a los criterios del mercado²⁷². Un antecedente directo de lo que ocurriría tres años después con la creación del grupo TENEO. Una sociedad anónima que agruparía a las empresas públicas que se consideraban que podían

implícita la renuncia a toda autonomía en la determinación del tipo de cambio, y, consiguientemente, en el área de la política monetaria». Ibídem, p. 180. Por otro lado, la ‘versión gubernamental’ de las razones para adoptar tal decisión la encontramos, en sus documentos congresuales del PSOE: «La integración en el sistema monetario europeo debe suponer un paso decisivo en la lucha contra la inflación. En primer lugar porque obliga a la convergencia de las tasas de inflación que, aunque mucho menores que en el pasado, aún son más altas en nuestra economía que en la media europea. Y obliga a esta convergencia porque la disparidad en la inflación se traslada a pérdidas de competitividad. En segundo lugar, impide el alivio artificial que suponían las devaluaciones al tener que mantener el tipo de cambio en una banda predeterminada. De esta manera se contribuye a que las exportaciones se basen en elementos más perdurables y más estables que los que podrían tener al contar con un tipo de cambio ‘conveniente’ para ellas pero perjudicial para la calidad del conjunto del sector productivo. La integración en el SME refuerza, por tanto, la credibilidad de la política antiinflacionista y marca un objetivo claro de mejora productiva para acometer el reto del Acta Única o la plena integración europea». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria Política y de Gestión de la CEF (1988-1990). 32º Congreso. Madrid 9-11 Nov. 1990”, Madrid, noviembre de 1990, sig. Fc 912, p. 22.

²⁷⁰ ALBEROLA ILA, Enrique, “La europeización de la política macroeconómica” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, op.cit., p. 343. Autor que continuaba su razonamiento de la siguiente forma: «Las autoridades monetarias esperaban que la entrada en el SME ayudara a cumplir los objetivos de inflación, ya que el compromiso cambiario con países de baja inflación debería moderar las expectativas de inflación en los agentes económicos, permitiendo una reducción de los diferenciales de interés y una moderación de los flujos de capitales. Esta estrategia tuvo un éxito relativo: las presiones sobre el tipo de cambio desaparecieron, pero las ganancias en términos de inflación fueron pequeñas y el diferencial de inflación no se redujo sustancialmente». Ibídem.

²⁷¹ ROJO DUQUE, Luis Ángel, “El camino de España hacia la Unión Monetaria Europea”, *Información Comercial Española*, nº 826, (2005), p. 73, dentro del dossier monográfico dedicado a *La modernización de la economía española (1929-2004)*. En este sentido, véase, ARÍSTEGUI, Javier, “Política monetaria: de la gestión independiente a la Unión Monetaria Europea” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., pp. 549-577. Y en otra línea de interpretación consúltese el trabajo de MONTES, Pedro, “Apertura e integración de la economía española: de la adhesión a la CEE al mercado único” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política...*, op.cit., pp. 69-93. Desde el mundo de la historiografía, OTERO CARVAJAL, Luis, “La transición económica. Del capitalismo corporativo a la Unión Europea” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, op.cit., pp. 365-451.

²⁷² Todo ello en base al artículo 123 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, *de Presupuestos Generales del Estado para 1989* [B.O.E. 29 de diciembre de 1988] por el cual dejaba de ser un Organismo Autónomo para convertirse en una Entidad de Derecho Público. 7 años después desaparecería el INI a través del Real Decreto-Ley 5/1995, de 16 de junio, *de creación de determinadas entidades de derecho público* [B.O.E. 20 de junio de 1995]. Véase asimismo la Ley 5/1996, de 10 de enero, *de creación de determinadas Entidades de Derecho Público* [B.O.E. 12 de enero de 1996].

competir en el mercado sin ayudas estatales, tal y como establecía las normativas de la Comunidad Europea²⁷³.

Así mismo se dieron algunos pasos más en la estrategia de la liberalización económica de cara a reducir el déficit público. Y entre estos estuvo el inicio de una política de privatizaciones hasta adelgazar el sector empresarial público a niveles históricos. De este modo, se comenzaron a vender “empresas muy internacionalizadas, o empresas rentables, pero sin intereses estratégico”, mientras que las no rentables permanecían en la esfera estatal²⁷⁴. Una política que tuvo sus tiempos, y que por, “motivos eminentemente políticos, a lo largo de estos años los gobiernos socialistas hablaron más de racionalización y desinversión que de privatización, logrando que la primera discusión formal en el Parlamento al respecto no se produjera hasta 1995”²⁷⁵. No obstante, si hasta 1987 se privatizarían más de una treintena de empresas públicas, en adelante, este proceso recobraría fuerza y así en,

«1988 sacó a Bolsa un 15% de Telefónica y un 20% de Endesa, entre 1989 y 1995 efectuó la privatización gradual de un 80% de Repsol, en 1993 puso a la venta el 50% de Argenteria, y en 1994 se deshizo del 91% de Enagás»²⁷⁶.

²⁷³ En base a lo detallado en la Ley 31/1991, de 20 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1992* [B.O.E. 31 de diciembre de 1991]. Véase aquí, SALAS COLLANTES, Javier, “Permanencia y cambio en el Sector Público Empresarial español: El INI y TENEÓ”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 16, (1995), pp. 33-38.

²⁷⁴ CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, op.cit., p 356. Los mismos autores añadieron: «Detrás de estas privatizaciones hubo un conjunto de causas dispares, desde la necesidad de financiar el déficit público, a la presión europea en pro de la racionalización industrial o las expectativas de compra creadas en los grandes capitales financieros, nacionales e internacionales. Con ellas se iniciaba uno de los procesos de mayor alcance en la transformación del tejido empresarial español». Ibídem. Ahora bien, como recuerda Ignacio Molina: «La decisión de privatizar algunas empresas deficitarias pero potencialmente viables respondía tanto a la voluntad de alterar las prioridades presupuestaria hacia la formación de capital o las transferencias individuales, como a la necesidad de reducir las ayudas de Estado que el Tratado de Roma prohíbe». MOLINA ÁLVAREZ de CIENFUEGOS, Ignacio, “La liberalización de la economía española (por efecto de la pertenencia a la Unión Europea)” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, op.cit., p. 302. Asimismo, véanse los argumentos ofrecidos desde instancias oficiales en, ARANZADI, Claudio, “La política de..., op.cit.; ZABALZA, Antonio, “El sector público español ante el mercado único”, *Papeles de Economía Española*, nº 41, (1991), pp. 37-49; así como el trabajo de, GARCÍA HERMOSO, José Manuel, “El INI como grupo de negocios: presente y futuro”, *Papeles de Economía Española*, nº 38, (1989), pp. 139-153.

²⁷⁵ POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 445. Consúltense también, COMÍN, Francisco, MARTÍN ACEÑA, Pablo y JIMÉNEZ, Juan Carlos, “Problemas actuales de la empresa pública en España”, *Papeles de Economía Española*, nº 52/53, (1990), pp. 231-246. Para la visión socialista sobre el citado proceso, BORRELL, Josep, “Sector público y procesos de privatización”, *Leviatán*, nº 66, (1996), pp. 39-58. Y en términos generales, CARRERAS, Alberto y TAFUNELL, Xavier, “La gran empresa en la España contemporánea: entre el mercado y el Estado” en COMÍN, Francisco y MARTÍN ACEÑA, Pablo (eds.), *La empresa en...*, op.cit., pp. 73-90. Todo ello junto con lo apuntado tanto en este Capítulo como previamente en el Capítulo “6. La «revolución burguesa pendiente»: las vicisitudes de la única política posible y/o el síndrome NHA”.

²⁷⁶ POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 445. Igualmente entre otros trabajos sobre la materia, GARCÍA FERNÁNDEZ, Julio, “Política empresarial pública” en COMÍN, Francisco y MARTÍN ACEÑA, Pablo (eds.), *La empresa en...*, op.cit., pp. 217-250; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Zulima, “El papel actual de la empresa pública: consideraciones previas a la privatización”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 101-102, (1995), pp. 9-25; CHARI, Raj S., “Spanish Socialists, Privatizing the Right Way?” en HEYWOOD, Paul (ed.), *Politics and policy...*, op.cit., pp. 163-179. Una interpretación sumamente positiva de este proceso en, FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Miguel Ángel, “Privatización, desregulación y liberalización de los mercados” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., pp. 661-682. Para un contexto europeo, VICKERS, John y WRIGHT, Vincent (eds.), *The Politics of Privatization in Western Europe*, London, Frank Cass, 1989. En relación a todas estas cuestiones aquí delineadas brevemente nos remitimos al apartado “8.2.1. La «obsesión enfermiza»”.

Toda esta sucesión de acontecimientos enlazados directamente o no, pero sí englobados dentro de la hipótesis del *recalentamiento* de la economía, llevaría al antiguo aliado sindical, UGT, a la altura de septiembre de 1989, a lanzar un conjunto de duras críticas contra lo que consideraban que se había transformado en un “nuevo dogma de fe”. *Críticas* que se concretaron entre otros muchos documentos en un informe de la propia organización titulado: “El recalentamiento de la economía. Una visión alternativa”.

Tres meses después de que la propia UGT por vez primera en su historia no hubiera pedido el voto para el PSOE –en aquella ocasión de cara a las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 15 de junio de 1989²⁷⁷– llegaría afirmar como “detrás de lo que han denominado recalentamiento está el fracaso de una política sin los controles adecuados, basado en la más pura lógica neoliberal”. Unas descalificaciones rotundas, impensables ni siquiera un año antes, y que venían a poner el acento en lo que buena parte de la izquierda política, social y sindical venía denunciando desde hacía años. Palabras que cobraban una inusitada fuerza a la hora de denunciar el antiguo consenso político-académico por el que se había guiado la política económica de los gobiernos socialistas. No terminaba ahí el diagnóstico de la central ugetista, pues tras cuestionar la que consideraban como la insuficiente cuando no falsa *versión oficial del recalentamiento*, señalaban lo siguiente: “Afirmar que la economía está recalentada, con una tasa de desempleo cercana al 17% indica, se diga cómo se diga, que está política no funciona”. Y por tanto,

«lo ocurrido es la consecuencia de una política determinada –y no de un fenómeno ‘natural’, irrepetible e indeseado por todos–, de una política que ha pervertido algo esencialmente bueno y positivo, como el crecimiento económico, y lo ha convertido en un fenómeno tan negativo y plagado de desequilibrios e inestabilidades que es necesario reorientar»²⁷⁸.

²⁷⁷ «Tradicionalmente, la Unión General de Trabajadores ha expresado públicamente su posición ante los diferentes procesos electorales orientado la opción de sus afiliados e, incluso, aconsejando el voto para una opción socialista concreta. Con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 15 de junio, sin embargo, nuestro pronunciamiento no pretende reclamar el voto para ninguna candidatura en concreto. Las profundas divergencias que nos separan del gobierno socialista en la orientación de la política económica y social y en cuanto a la defensa de los intereses más concretos de los trabajadores, de los parados, de los jubilados, de los jóvenes y de las mujeres que quieren acceder a un puesto de trabajo nos obligan a ello sin renunciar a nuestra identidad como sindicato de orientación socialista». Extraído de, *Unión*, nº 3, 25 de abril de 1989, número especial, y que a su vez recogía la “Resolución VI del Comité Confederal Ordinario”. Meses más tarde aclararía: «Esto parece tan claro como que no aceptamos ni aceptaremos ningún tipo de seguidismo partidario». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al VII Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 13 y 14 de noviembre de 1989, sig.ant. B/55/04, p. 46. Véase a su vez lo apuntado en la *nota 154*.

²⁷⁸ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Reivindicativa, “El recalentamiento de la economía. Una visión alternativa”, Madrid, 8 de septiembre de 1989, sig. 001877-002, p. 1. Se cerraba aquel informe con la preocupación de que una vez más los salarios fueran considerados, en la práctica, el *único culpable*: «Finalmente, en este esquema, no es necesario ni conveniente que los salarios asuman un papel protagonista en la corrección de los desequilibrios. No es necesario porque, como hemos visto, las rentas salariales no han sido las culpables de ellos y su comportamiento, hoy cada vez más se reconoce, ha sido moderado, y no es conveniente porque consideramos que es positivo que las rentas salariales participen, al menos en una parte, en los beneficios del crecimiento económico, mejorando su poder adquisitivo». *Ibidem*, p. 16. Un año después en otro informe de UGT se constataba –una vez finiquitada definitivamente la posibilidad de cualquier tipo de concertación social– como el «ajuste indiscriminado anunciado por el Gobierno, que se limita a amenazar a los ciudadanos con un empobrecimiento lineal, olvidando la situación de cada colectivo, como se pudieran empobrecerse igual quienes a duras penas consiguieron el mantenimiento de su poder adquisitivo y quienes aprovechando el período de crecimiento han aumentado exponencialmente su volumen de beneficios». AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Sindical, “La alternativa socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica”, Madrid, a 15 de septiembre de 1990, sig. 001880-001, p. 4. Véase igualmente las duras críticas contenidas en, AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al VII Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 13 y 14 de noviembre de 1989, sig.ant. B/55/04, pp. 6-ss.

Desde el Ejecutivo se elaboraría y desarrollaría un nuevo “paquete de medidas”, que se irían reflejando, paso a paso, en los PGE de aquellos mismos años. Téngase presente, antes que avancemos, un aspecto clave: como se ha podido ver parcialmente y se detallará con mayor profundidad en nuestro *Anexo obligado*; las negociaciones en torno a los PGE –especialmente los del año 1987 y 1988– devendrían en el punto de arranque definitivo de la futura ruptura de la familia socialista.

Los Presupuestos Generales del Estado a partir de 1986 serían dirigidos ya totalmente por el equipo de Solchaga, heredado en gran medida, eso sí, de los de Boyer²⁷⁹. La primera observación a realizar resulta del todo palpable: la profundización en las líneas maestras de la primera legislatura. Una cuestión que puede comprobarse principalmente en las partidas destinadas al gasto público. Sacrificado “el componente social del presupuesto público”, el mismo se dirigirá a la mejora de la formación de capital fijo de cara a incrementar y a acelerar el crecimiento económico²⁸⁰. De la misma forma, se debe de incluir otra oportuna observación: se volvieron a errar en prácticamente todas las previsiones gubernamentales en relación a la evolución presupuestaria²⁸¹.

Igualmente ha de anotarse una circunstancia a la hora de explorar las partidas presupuestarias. En tanto las mismas se encuentran marcadas, en adelante, por el proceso de integración europea, y por consiguiente, se hayan subordinadas al cumplimiento del Tratado de Adhesión a la CEE²⁸². Una nueva realidad que se reflejará ampliamente con la llegada de los

²⁷⁹ En una primera etapa el «el equipo de Carlos Solchaga estaba íntegramente heredado de Miguel Boyer (conservó incluso el *pool* de secretarías) pero, después de una legislatura completa, presentaba serias fisuras». Meses más tarde, y tras ciertas discrepancias por parte de *técnicos* como Luis de Velasco, entre otros, se decidiría «poner coto a esta situación, que se les escapaba de las manos y que habitualmente salía a relucir en las páginas de los periódicos. Tras consultar con el Presidente del Gobierno, hizo una remodelación de corte liberal». TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 30. Entre los nuevos nombramientos y sobre todo en función de sus nuevos cargos, tres personas pasarían a ser los pilares del equipo Solchaga: José Borrell, Guillermo de la Dehesa y Miguel Ángel Fernández Ordoñez [véase en el Capítulo 5, *nota* 59]. Nombramientos que no sentarían bien dentro del propio gabinete de Gobierno: «Alfonso Guerra montó en cólera cuando conoció los nombramientos. El aspiraba a colocar a alguno de sus hombres de confianza en Economía y Hacienda». *Ibíd.*, p. 31. Otros autores han ido inclusive más lejos hablando como la llegada de Solchaga y su afianzamiento constituiría una derrota del propio Guerra: «Para sustituir a Boyer nombró a Carlos Solchaga, una cuña de parecida madera, que iba a mantener iguales distancias y tensiones con Alfonso. Solchaga era tan chulo y tan impertinente como su predecesor, aunque hiciera menos exhibiciones de conocimientos filosóficos. Y en la gestión económica, era, por lo menos, tan riguroso y duro como Boyer. Un ortodoxo sin concesiones. Por eso el triunfo del vicepresidente fue bastante más modesto de cómo se vendió. Cuando le preguntaron a Felipe por la postura de su vicepresidente, confesó: ‘Alfonso Guerra no va a ser nunca un obstáculo para una decisión del presidente del Gobierno, porque él aceptara estar donde yo quiera que esté, porque él siempre ha estado dispuesto a hacer lo que yo diga, aunque no esté de acuerdo’». PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González...*, *op.cit.*, pp. 314-315.

²⁸⁰ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 176. Y añadía lo siguiente: «[L]a formación de capital fijo aumento de forma sostenida en 1,6 puntos del PIB hasta el 5,2 por ciento del PIB en 1991; y otros 0,8 puntos del PIB se dirigieron a la formación de capital humano, tanto por medio de incrementos del gasto en educación general como mediante nuevos programas de formación laboral». *Ibíd.*, pp. 176-177.

²⁸¹ Por ejemplo en el importante apartado del saldo presupuestario. Para 1986 el objetivo se establecía en un -4,7% cuando el resultado sería el -5,2%; para 1987 -4,5% y -3,5%, respectivamente, para 1988 -3,5% y -2,9, respectivamente; para 1989 -2,7% y -2,2% respectivamente. Una situación que se repetiría en los siguientes tres años: para 1990, -1,7% y -2,7%, respectivamente; para 1991, -0,9% y -2,6%, respectivamente; y para 1992, -1,9% y -3,2%, respectivamente. Datos extraídos de, BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 223, Tabla 7.3., “Planes presupuestarios para el Estado español (excluyendo Organismos Autonómicos y Seguridad Social) y resultados reales, 1983-1992”.

²⁸² Nos remitimos a lo previamente apuntado en el apartado “6.2.4. El embrujo de la *retórica modernizante*”.

primeros Fondos Estructurales de las Comunidades Europeas²⁸³. Con todo, si se presta una mínima atención tanto a los de 1986 como a los de 1987, existe una clara línea de continuidad a la hora de establecer las prioridades socioeconómicas: la firmeza contra la lucha contra el déficit público y contra la inflación²⁸⁴. Si en los del ochenta y seis se señala que el objetivo fundamental es la “reducción del déficit público como mecanismo indispensable para conseguir el necesario ajuste en la situación de crisis económica”²⁸⁵; en los del ochenta y siete se insiste en la necesidad de “reducción de la tasa de inflación con objeto de acércale a posiciones cercanas a la del resto de países comunitarios”²⁸⁶. A saber, se mantenían las mismas líneas estratégicas tanto en tiempos de *crisis* como de *bonanza*²⁸⁷.

En todo caso, en estos últimos presupuestos citados ya se evita hablar de crisis para directamente hablar de un “crecimiento equilibrado, estable y duradero” –expresión que se

²⁸³ Véase aquí el estudio de PÉREZ, Sofía A., *Banking of Privilege. The Politics of Spanish Financial Reform*, Ithaca, Cornell University Press, 1987 [véase una aclaratoria reseña del citado libro por parte de Francisco Marcos en, *Revista de Historia Económica*, vol. XVII, n° (1999), pp. 246-253] así como el trabajo de, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pascual, “Los fondos estructurales europeos y el desarrollo regional: balance de una década desde la perspectiva española”, *Información Comercial Española*, n° 766, (1997), pp. 135-145, dentro del dossier *Balance de diez años en la Unión Europea*. Asimismo, sobre la cuantificación e impacto de los fondos estructurales europeos nos remitimos al apartado “8.1. ¿El gran salto adelante?”.

²⁸⁴ Muy aclaratorio de lo anterior, SOLCHAGA, Carlos, “Presentación ante el Pleno del Congreso del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1986”, *Hacienda Pública Española*, n° 97, (1985), pp. 21-62; y, id., “Presentación ante el Pleno del Congreso del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1987”, *Hacienda Pública Española*, n° 102-103, (1986), pp. 17-70. Un discurso marcado por la permanente –y añadiríamos *incrustada*– ‘obsesión’ por el control de la inflación y en consecuencia por la moderación salarial, a pesar de iniciarse claramente un periodo de expansión económica. Una posición ortodoxa que no mucho tiempo atrás el propio Solchaga había rechazado de forma contundente en las páginas de *El Socialista*: «[N]adie puede esperar que mediante la moderación salarial tan sólo se pueda superar la situación actual». Añadiendo: «Esto no sólo es económicamente equivocado sino que es socialmente injusto y políticamente intolerable» [SOLCHAGA, Carlos, “La insensibilidad del Gobierno”, *El Socialista*, (1981)]. Citas extraídas de, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 59. Complementétese lo anterior con lo apuntado en el Capítulo 6, *nota* 125.

²⁸⁵ Extraído de la *Exposición de Motivos* de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, *de Presupuestos Generales del Estado para 1986* [B.O.E. 28 de diciembre de 1985] En la presentación de aquellos mismos presupuestos 1986, uno de los actos más importantes de la vida parlamentaria, el propio Carlos Solchaga llegaría a señalar «nada tengo personalmente contra el déficit» y «el gobierno no tiene prejuicios ideológicos» en relación al gasto público [SOLCHAGA, Carlos, “Presentación ante el...”, *op.cit.*, y destacado asimismo en, RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “Carlos Solchaga Catalán” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, *op.cit.*, p. 237]. Para una visión más general, SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, *op.cit.*, pp. 249-285, en concreto, el capítulo VIII, “La política fiscal y presupuestaria”. Por su parte, unos meses después, en concreto un 24 de febrero de 1987 en el Debate de la Nación, Felipe González afirmaría: «La inflación sigue siendo uno de los principales caballos de batalla de la economía española. Si perdiéramos ésta, habríamos perdido también la de la competitividad y la posibilidad de que nuestra economía se siga fortaleciendo, de que nuestro apartado productivo siga modernizándose y, sobre todo, de que el empleo siga aumentando». CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE, *Debate sobre el Estado de la Nación. Intervención del Presidente del Gobierno. Felipe González Márquez*, III Legislatura, n° 31, 24 de febrero de 1987 (número de expediente 200/000002), pp. 1736-1739.

²⁸⁶ Extraído de la *Exposición de Motivos* de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, *de Presupuestos Generales del Estado para 1987* [B.O.E. 24 de diciembre de 1986].

²⁸⁷ Como nuevamente señala Carles Boix: «De acuerdo con las previsiones presentadas por el Secretario de Estado de Economía y Hacienda [Antonio Zabala], entre 1985 a 1990, el 83 por ciento de todos los aumentos netos de fiscalidad [...], que crecieron 4,7 puntos del PIB, se aplicó a reducir el déficit público». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 186.

trasladaría de forma mimética a la propia documentación socialista en aquel tiempo— aunque no se dejara de insistir en que “mantienen los principios básicos ya reflejados en años anteriores”. Pero no sólo, pues se procede a dar un paso más cuando en relación a la financiación del déficit público, en tanto por vez primera se “admite la posibilidad de operaciones de endeudamiento”²⁸⁸. Recuérdese, además, que en aquel año la Agencia Tributaria recaudaría un 110% más de lo esperado²⁸⁹. Todo marchaba razonablemente bien en términos económicos.

Parecida o similar tónica se mantendrá en lo fundamental durante los que bien pueden ser considerados como los “años dorados” del socialismo, por lo menos, en el terreno de lo económico: 1988 y 1989²⁹⁰. No deja de ser relevante, en términos históricos, que sea más importante resaltar lo que no se realiza que lo que se proyecta a nivel presupuestario²⁹¹. Nos referimos, sencillamente, a que en estos años de fuerte crecimiento económico no se producirá ningún tipo de *salto adelante* en gasto social en términos históricos a medio-largo plazo²⁹². Todo ello a pesar de las posibilidades presupuestarias, por más que no se haya dejado de insistir desde escuela clásica de un “retorno a la laxitud presupuestaria”. Afirmación que viene a enfocar, de forma unilateral, los desequilibrios macroeconómicos por la expansión del gasto público²⁹³.

Dicho esto, y volviendo a los *Presupuestos*, la aprobación de los del año 1988 coincidirán con la publicación de la Sentencia del TC del 21 de mayo de 1987, que afectaba, en adelante, a la forma de proceder en la elaboración y contenidos de los mismos²⁹⁴. Más allá del alcance que tendrá en un futuro cercano la citada *sentencia*, los presupuestos de aquel año en plena oleada de crecimiento económico a la que par que de conflictividad, tendrán a un gran protagonista político, económico, social y evidentemente electoral: las pensiones en donde se

²⁸⁸ Extraído de la *Exposición de Motivos* de Ley 21/1986, de 27 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1987*. De notable relevancia para seguir el ‘argumentario oficial’ es el trabajo de síntesis de, BORRELL, Josep, “Balance de la política presupuestaria durante el período de 1982-1988”, *Hacienda Pública Española*, nº 110-111, (1988), pp. 19-35.

²⁸⁹ Cifras más concretas en, JIMÉNEZ, Miguel y SALAS, Rafael, “Causas del incremento en la recaudación del IRPF, 1982-1987”, *Hacienda Pública Española*, nº 118, (1991), pp. 141-157.

²⁹⁰ Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1988* [B.O.E. 24 de diciembre de 1987]; y, Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1989* [B.O.E. 29 de diciembre de 1988] respectivamente.

²⁹¹ Véanse los datos contenidos en, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, *Escenario macroeconómico y presupuestario, 1989-1992*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1988. Y asimismo ZARAGOZA RAMEAU, José Alberto, “El presupuesto en el marco de la planificación económica a medio y largo plazo: El escenario macroeconómico y presupuestario, 1988-1992”, *Hacienda Pública Española*, nº 112, (1988), pp. 53-58. A complementar con el trabajo estadístico ya citado de, “Información estadística sobre..., *op.cit.*”.

²⁹² Véase lo apuntado en la *nota 41*.

²⁹³ MALO de MOLINA, José Luis, “Una visión macroeconómica de..., *op.cit.*”, p. 16. Y decía: «La rapidez de la expansión del sector público y las distorsiones que creaba su financiación se convirtieron en la principal amenaza para los objetivos de restaurar la estabilidad [...]. De hecho, las autoridades tendieron a confiar en la sostenibilidad del elevado crecimiento de la recaudación y a ceder, en el marco de reglas muy débiles de disciplina presupuestaria, frente a la creciente presión de las demandas de gasto público». Ibídem. Ahora bien, según otra opinión *disidente* por esta misma vía, «[s]ubliminalmente, introducen la idea que de la política monetaria ha sido correcta y que la responsabilidad de las dificultades económicas debe imputarse a la expansión desmesurada del gasto público». MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Quiebra del modelo económico español” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 146.

²⁹⁴ Tribunal Constitucional (TS). Sentencia 65/1987, de 21 de mayo, *del pleno del Tribunal Constitucional, por la que se desestima el recurso de inconstitucionalidad número 222/1984, interpuesto contra el artículo 52 y la Disposición adicional quinta de La Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para 1984* [B.O. E. el 7 de junio de 1987].

procede a ampliar su concepto político-jurídico de cara a que las mismas quedarán en adelante “sujetas a los mecanismos correctores inspirados en los principios de igualdad, solidaridad y Justicia distributiva”²⁹⁵. Por otro lado, el Gobierno seguirá insistiendo por el *lado de la oferta* a través de las políticas fiscales, en donde se llevará a cabo una nueva “reducción de los tipos en la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. Una nueva reducción que como se reconoce en el propio texto tiene por fin en lo central, “favorecer la inversión privada al liberar una parte de las rentas anteriormente grabadas por el impuesto, para que aquella pueda continuar desempeñando su papel de coadyuvante de la inversión pública como motor de la reactivación económica”. Es decir, se sigue apostando claramente por el motor privado como revulsivo del crecimiento económico²⁹⁶.

Por su parte, y ya refiriéndonos a los del año ochenta y nueve, junto al esfuerzo inversor destinado a la universalización y extensión de la Seguridad Social y con ello a la ampliación de su cobertura –aspectos destacados en la propia *Exposición de Motivos* de la Ley 37/1987²⁹⁷– se continuará con las mismas líneas económicas²⁹⁸. Un año que también tiene por objeto otro gran protagonista del que ya se ha hablado: “el camino de racionalización del sector público” por la vía de su liberalización²⁹⁹.

7.1.3. Del «recalentamiento» económico a Maastricht: el *Programa de Convergencia* (1989/1990-1992)

«El hecho era que el pragmatismo de Felipe González (el pragmatismo sirve para acertar conforme a las premisas dadas de antemano, no para crear nada que esté fuera de la experiencia propia); digo que el pragmatismo de Felipe González le hacía ver que Maastricht podría efectivamente tener grietas, fallos de concepción [...] pero nada era tan seguro como que Maastricht o cualquier otra cosa resultaría precaria e inverosímil colocada bajo una luz intachable y mesiánica [...]. Tal como estaba diseñado puede que no fuese más que la triste felicidad de lo posible, pero así y todo era la única manera de hacer algo».

CÁNDIDO, *La sangre de la rosa*³⁰⁰.

²⁹⁵ Extraído de la *Exposición de Motivos* de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1988*. Con respecto a estos últimos presupuestos consúltense el análisis de, MONTALVO, Jaime, “Anotaciones a la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1988*”, *Documentación Laboral*, nº 24, (1988), pp. 281-302.

²⁹⁶ Una interpretación confirmada tanto por el Ministro de Economía –SOLCHAGA, Carlos, “Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988”, *Hacienda Pública Española*, nº 105-106, (1987), pp. 23-61 [discurso pronunciado en el pleno del Congreso de los Diputados un 26 de octubre de 1987]– como por el entonces Secretario General de Planificación y Presupuestos–ZABALZA, Antonio, “El contexto macroeconómico del presupuesto de 1988”, *Hacienda Pública Española*, nº 105-106, (1987), pp. 87-98.

²⁹⁷ Nuevamente consúltense las aportaciones de, SOLCHAGA, Carlos, “Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989”, *Hacienda Pública Española*, nº 112, (1988), pp. 15-44 [discurso pronunciado en el pleno del Congreso de los Diputados un 25 de octubre de 1988]; y de, ZABALZA, Antonio, “El impacto macroeconómico del presupuesto de 1989”, *Hacienda Pública Española*, nº 112, (1988), pp. 45-52.

²⁹⁸ En «1983 estaba cubierta el 86,83% de la población, aproximadamente 33 millones de personas. La ley General de Sanidad de abril de 1986 estableció el principio de universalización de la cobertura que terminaría de hacerse efectivo en 1991 con el 98,8%, alcanzando la cobertura a 39 millones». ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de..., op.cit.*, pp. 133-134.

²⁹⁹ Extraído de la *Exposición de Motivos* de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1989*.

³⁰⁰ CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de..., op.cit.*, p. 191.

La tercera etapa dentro de la “década del cambio” pondrá a prueba el modelo de crecimiento económico por el que se opta desde el Ejecutivo, o mejor cabría señalar, desde Economía. Y lo que no es menor, la tesis del supuesto “milagro económico socialista”³⁰¹.

Si un aspecto vendría a demostrar la citada crisis de los noventa fue, sencillamente, que lejos de crearse un marco de crecimiento económico creciente, seguro y consolidado, aquellas políticas generaron ante todo un “false sense prosperity”³⁰². Ello con una consecuencia, pues tal modelo económico distaría de ser un ejemplo de “cultura de la estabilidad”, tal y como ha mantenido buena parte de la *academia liberal*³⁰³.

En breve, se diría con una clara intencionalidad que los “españoles habían vivido por encima de sus posibilidades”³⁰⁴. Frase acuñada en aquel tiempo y que en cada crisis económica por la que ha pasado España no se ha dejado de repetir, con el latiguillo *ad hoc* de la necesidad de “apretarse el cinturón”. Una interpretación que ha tendiendo unidireccionalmente a acusar siempre al desmedido *gasto público* y las rentas salariales de los propios desequilibrios macroeconómicos³⁰⁵. Fuera como fuese, aparecía así con toda su fuerza los efectos demoledores de un modelo de acumulación que se mostraría altamente inestable en los siguientes años, y que se llevaría por delante buena parte de la *confianza* acumulada por parte del capital³⁰⁶.

³⁰¹ Tesis ampliamente citada por buena parte de la academia tanto conservadora-liberal como progresista-liberal. A modo de ejemplo, POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 424. Por lo demás, en el ya citado artículo periodístico del entonces secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Agustín Moreno, y titulado: “El Gobierno en el país de las maravillas”. Texto que en unos pocos miles de caracteres derrumbaría un sin fin de *mitos* sobre los que quisieron asentar los gabinetes socialistas su discurso triunfalista. Los datos que allí se aportan, insistimos en unas pocas líneas, son lo suficientemente explícitos de la tesis aquí mantenida. MORENO, Agustín, “El Gobierno en el país de las maravillas”, *El País*, 11 de agosto de 1988. Véase, por lo demás, lo apuntado en el Capítulo 2, *nota* 601.

³⁰² PETRAS, James, “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y id. (eds.), *Mediterranean Paradoxes...*, *op.cit.*. Visiones también críticas a nivel internacional sobre los efectos de las ‘políticas de ajuste positivo’ implantadas desde los ochenta en, CHOSSUDOVSKY, Michel, “Crítica del «ajuste estructural»”, *Viento del Sur*, nº 15, (1993), pp. 70-83; y, id. *The Globalization of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms*, Penang, Third World Network, 1997. Consúltese también, GAURON, André y BILLAUDOT, Bernard, *Crecimiento y crisis. Hacia un nuevo crecimiento*, Madrid, Siglo XXI, 1987.

³⁰³ GARCÍA DELGADO, José Luis y JIMÉNEZ, Juan Carlos, “El proceso de modernización económica: perspectiva histórica y comparada” en id. (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 28.

³⁰⁴ «De esta forma, se descargaba la responsabilidad del desajuste en las macromagnitudes sobre el comportamiento compulsivo de los consumidores, ocultando las causas de tales disfunciones: los efectos perversos ofrecidos por la política económica instrumentada desde 1985 y cuyo deterioro más significativo se cifraba en el déficit comercial acumulado durante todo el periodo de crecimiento». TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 30.

³⁰⁵ Como criticara muchos años después –en concreto en 2010– Vicenç Navarro la tónica de acusaciones contra el gasto público, sí cabe, han cobrado más fuerza: «Existe una interpretación de la crisis económica y financiera española, muy generalizada en los *establishments* financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea (y también de España), que atribuye tal crisis al exceso de gasto público (incluyendo el gasto social de su Estado del Bienestar), financiado a través de un elevado endeudamiento público que ha alcanzado niveles insostenibles. De esta interpretación deriva la percepción de que en España estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, exigiéndose como medida de resolución de la crisis la implementación de políticas de austeridad y reducción del gasto público». Sin embargo, los datos que aportaba en ese mismo artículo periodístico, el autor terminaba por desmontar, una vez más, la tesis enunciada. NAVARRO, Vicenç, “Los errores de la austeridad”, *Público*, 12 de agosto de 2010.

³⁰⁶ Véanse asimismo las opiniones contenidas en, JIMÉNEZ, Juan Carlos (ed.), *Empresas y empresarios españoles en la encrucijada de los noventa*, Madrid, Civitas, 1993. Mucho más explícito, PÉREZ CAMPANERO, Juan A., “La pérdida de credibilidad de la economía española”, *Libro Marrón*.

Sin embargo, el interrogante central que nunca se llegaría a formular desde los ámbitos oficiales, en tanto ponía en cuestión la esencia del modelo económico adoptado –y al que de ninguna de las maneras se estaba dispuesto a renunciar– lo formularían Fernando Esteve y Rafael Muñoz en un trabajo no publicado para el Instituto Sindical de Estudios. ¿Qué decían? Pues tras cuestionar la política económica de los gobiernos socialistas, a la que califican como ejemplo de “síntesis neoclásica”, señalaban como quedada por “responder la importante pregunta de por qué la economía española ha exigido márgenes muy superiores a la del resto de los países industrializados para poner en marcha el proceso de recuperación de la inversión”. Una cuestión esencial, clave, para entender el modelo productivo económico de este tiempo. Su conclusión, que como reconocían no era estrictamente económica sino histórica a la par que sociológica, tenía una dirección notablemente acusada: “da la impresión de que esa actuación no es sino la última consecuencia económica de la transición política española”. Concluyendo:

«Así, se habría permitido a la vieja clase empresarial seguir disfrutando de sus privilegios en estos años a la vista de su destino final cuando, como resultado de la integración en la CEE, sea sustituida por una nueva clase empresarial más dinámica y arriesgada capaz de cumplir su papel con tasas de beneficio más pequeñas [...]. En la medida, finalmente, que esta hipótesis no estuviera lejos de la verdad, el juicio económico que habría de recaer sobre la política económica de estos últimos sería doblemente negativo. Negativo por razones de eficiencia y negativos por razones del otro criterio de evaluación económica: la equidad»³⁰⁷.

Vistos los acontecimientos que jalonan tanto las dos etapas descritas como la tercera que a continuación se examinará, su conclusión puede parecer fuerte, extrema, dentro de las habituales *lecturas liberales*. Ahora bien, cuando menos apuntan una hipótesis de trabajo no descartable para el conjunto de todo el periodo aquí tratado. Pues aborda, en suma, tres hechos que se visualizan sin mayores contratiempos en las siguientes páginas: primero, el permanente conflicto capital/trabajo en la distribución del crecimiento de la riqueza del país; segundo, la constante tensión por limitar, acortar, el siempre remarcado *giro social* en base al sostenimiento de una misma política económica en su imperturbable afán por mantener los equilibrios macroeconómicos –inflación y déficit público, principalmente– tibiamente alcanzados; y tercero, ante las evidentes consecuencias que tendría la dura crisis económica que surge en estos años y que marcará todo el primer lustro de los noventa. Concretándose todo ello en el inicio de una nueva política de duro ajuste que se acometerá con mayor fuerza, quizás, que a principios de los años ochenta. De esta forma, cierta o no esta hipótesis de trabajo, lo que mostrarán estos años que median entre 1989/1990-1992, no sólo es la inviabilidad a medio y largo plazo del “modelo de acumulación” por el que se opta –basado en la permanente búsqueda de incrementar los excedentes empresariales a toda costa– sino sobre todo su incapacidad por ofrecer una respuesta adecuada el *trade-off* entre eficiencia y equidad. A lo que obligadamente debe

Círculo de Empresarios, nº 1, (1992), pp. 267-292. Todo ello junto con la apuntado en el Capítulo 6, *nota 210*.

³⁰⁷ AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, pp. 47 y 50, respectivamente. Hipótesis que se repetiría en un informe de la CEC de UGT tres años después: «El excedente bruto empresarial [...] mantiene, después de Grecia, el nivel más elevado de la Comunidad, ocho puntos y medio por encima de la media europea. La participación de los beneficios empresariales en la renta nacional, descontando los trabajadores autónomos, ha crecido en ocho puntos desde 1982. En ese año estaba al nivel de la media comunitaria y hoy se sitúa cinco puntos por encima y en segundo lugar de los Doce, inmediatamente después de Holanda. Si tenemos en cuenta el nivel relativamente bajo de capitalización de las empresas españoles, no es difícil concluir que la tasa de rentabilidad del capital invertido es la mayor de Europa». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de gestión que presente la C.E.C. al V Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 17 y 18 de diciembre de 1992, sig.ant. C/46/14-18, p. 618. Véase lo apuntado en la *nota 21* y *nota 100*.

añadirse el carácter acomodaticio de una estrategia económica, que siempre tuvo claro que no era conveniente ni oportuno enfrentarse con las clases dominantes del país³⁰⁸.

A diferencia de la crisis de los setenta en donde la “no política” se había convertido en la pauta dominante como señalara Miren Etxezarreta³⁰⁹, en estos años podría hablarse de la “misma política” con ligeros retoques, con el añadido que en su día introdujera la propia UGT: la “incertidumbre o desconcierto es, probablemente, uno de los aspectos más relevantes de la actual crisis. A diferencia de los anteriores períodos de crisis, en este se observa una completa falta de explicaciones [...]. La economía oficial guarda silencio al respecto”³¹⁰. A la ya preocupante situación que se oteaba en el horizonte, quedaba política y socialmente en el aire la *sensación colectiva* de que no se había avanzado en tiempos de bonanza en muchos de los aspectos claves del país, como anteriormente se adelantó³¹¹.

El marco político de actuaciones del gobierno socialista, ya tocado *per se* por varios años de gestión al frente del Ejecutivo, se verá afectado en lo básico por tres procesos interrelacionados: primero, los resultados de las elecciones generales de 1989, en donde a pesar de obtener una mayoría parlamentaria técnica absoluta, se demuestra que la posibilidad de que el llamado socialismo democrático se vea apeado del poder no es descartable. Tan sólo han pasado siete años de los veinticinco programados para la realización del gran proyecto de la modernización socialista. Segundo, el transcurrir de este mismo proyecto modernizador ha disipado muchas de las “esperanzas” depositadas en el presupuesto regeneracionista del ochenta y dos, al contrastarse las limitaciones del cambio reformador “ilustrado” en palabras de Julio Aróstegui³¹². La frustración de la *esperanza* en el cambio comenzará a ser una de las características de aquel tiempo. Y tercero, durante la tercera legislatura socialista (1989-1993) tanto al Gobierno como al propio PSOE ya les resultará mucho más difícil controlar la paz social y por tanto la cohesión social del país, a lo que se sumarían numerosas descalificaciones públicas por parte de los agentes sociales por lo que consideraban los *efectos perversos* de las políticas “neoliberales” desarrolladas³¹³. Con razón más de un autor hablaría de cómo al Gobierno socialista se le “ha acabado el oxígeno del 82”³¹⁴.

³⁰⁸ Seguimos aquí lo planteado fundamentalmente: SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política...*, *op.cit.*; PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, *op.cit.*; y, CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, *op.cit.*

³⁰⁹ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, pp. 36-37.

³¹⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de gestión que presente la C.E.C. al V Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 17 y 18 de diciembre de 1992, sig.ant. C/46/14-18, p. 12. Y se señalaba a continuación: «La base de tal desconcierto y de la carencia de ideas se encuentra en el hecho de que esos organismos internacionales, expertos, servicios de estudios y ministerios son incapaces de reconocer que esta crisis es la demostración palpable del gran fracaso de las tesis económicas neoliberales que ellos mismos han sustentado durante largos años». *Ibidem*, p. 13.

³¹¹ Desde una visión *optimista*, PÉREZ HERRERO, Pedro y RUIZ, José Juan, “La economía española ante la década de los noventa: expectativas de futuro y lecciones del pasado”, *Información Comercial Española*, nº 676-677, (1989-1990), pp. 71-97, dentro del dossier monográfico, *Cincuenta años de economía española: 1939-1989*.

³¹² ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, *op.cit.*. Por su parte el también historiador Antonio Elorza destacaría: «La deriva hacia la derecha socialista puede ofrecer así el aspecto de una traición a los principios [...]. Por no hablar de la visión tradicional de quienes constatan una vez más, gracias a Felipe González, el fracaso de la socialdemocracia reformista [...] aquí no ha habido el menor esbozo de reformas de estructura». ELORZA, Antonio, “Las raíces del «fenómeno socialista»” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 59.

³¹³ Especialmente relevantes tanto por su contenido como por su significado –tal y como venimos explicando a lo largo de estas páginas– sería la progresiva radicalización del lenguaje político de la UGT

En verdad, y lejos de los tradicionales lugares comunes de este tiempo, en las tres fases en que se ha dividido este estudio, excepto a lo largo de los años 1985-1986 –y siempre de forma *relativa y parcial*– el conflicto obrero, social o estudiantil sería una constante. Claros ejemplos –generalmente obviados– de las resistencias pero también de la falta de consensos generalizaciones en torno a l proyecto socialista, más allá de las realidades políticas-electorales.

Incluso desde la CEOE se pasaría a una clara ofensiva contra el Gobierno, tras las que pueden ser calificadas como sus “no malas relaciones” en los inmediatos años anteriores. Harto significativo resultaría, en este sentido, dos de las asambleas generales celebradas por la gran patronal del país en mil novecientos noventa y dos. Si en la primera, en enero, sobresaldría más por el espectáculo que conllevó en pleno centro de Madrid la reunión de más de tres mil empresarios, que antes por las pequeñas distancias que se comenzaban a marcar con respecto al Gobierno, quien solía asistir como invitado a este tipo de eventos a través de destacados ministros económicos, junto con sus respectivos secretarios de Estado, en primera línea³¹⁵; en la segunda, en septiembre, cuando la situación económica empeoraba día a día, la CEOE no sólo es que hablara de “grave peligro” o de un “claro enfriamiento” para referirse a la situación del país, sino que no dudaba en hablar de “desaliento empresarial” y/o “sentimiento de pesimismo”.

Si por este lado, el discurso de rigor no distaba de las constantes declaraciones altisonantes –en boca de José María Cuevas o Juan Jiménez Aguilar, las dos *caras* más conocidas de la CEOE en este tiempo– siempre imbuidas de una mezcla de viejo paternalismo franquista con ciertas dosis de demagogia; lo que realmente de nuevo podían observarse, eran las afirmaciones de tenor de que “buena parte de una política económica y social [está] agotada”. Más allá de las consabidas acusaciones contra Gobierno y sindicatos, lo cierto es que la CEOE, hasta ese momento, nunca se había mostrado tan beligerante al menos en público y por escrito, respectivamente. Pero es que además la última asamblea citada se celebraría a puerta cerrada. Una reunión en donde se iría un paso más allá. Que la patronal demandará “solidaridad empresarial” y que reclamará “acometer otras acciones para reducir los diferentes costes de producción de bienes y servicios” entraba dentro de la lógica establecida. No lo que no entraba dentro de esta misma lógica, y ni siquiera dentro de lo previsible, es que la propia CEOE manifestará su intención de que no dudaría en *desobedecer, subvertir* o en su caso

al respecto. Así, por ejemplo, a finales de diciembre de 1992 se destacaba con respecto a la grave situación económica del país: «Anticipando conclusiones, cabe decir que la situación actual es la consecuencia del neoliberalismo que se extendió, como un reguero de pólvora [...]. Lo lamentable es, sin embargo, que las opciones políticas de signo distinto –progresista o de izquierda– y de las que cabía esperar una respuesta no han querido o no han podido ofrecer un discurso alternativo. Al final han optado por aplicar sus mismas recetas». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de gestión que presente la C.E.C. al V Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 17 y 18 de diciembre de 1992, sig.ant. C/46/14-18, p. 6. Consúltase asimismo un texto de unos años antes, pero tanto o más significativo que lo que acabamos de leer: ZAMBRANA, Justo, “¿Es regresiva la política económica del PSOE?”, *Leviatán*, nº 34, (1988), pp. 5-24.

³¹⁴ TUSELL, Javier y SINOVA, Justino, “Prólogo. Diez años de (poder) y un día (de flaqueza)” en id. y id. (coords.), *La década socialista...*, *op.cit.*, p. 7. Estos mismos autores no dudaría en hablar de la *desilusión, ocasión pérdida, ocasión histórica*.

³¹⁵ La primera asamblea se celebraría los días 30 y 31 de enero en el Palacio de Congresos de Madrid bajo el eslogan, “La empresa española en la nueva Europa” [CEOE y CEPYME, *Conferencia empresarial 1992. La empresa española en la nueva Europa. Intervenciones, 30 y 31 de enero*, Madrid, CEOE, 1992]. Véase al respecto, la descripción, contenido y hasta el propio significado que adquiriría aquel acto en, CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, *op.cit.*, p. 358. Por lo demás, desde la UGT se atacaría duramente la presencia de altos miembros del ejecutivo en tal cita: «La primera consiguió la presencia, en sus actos, de una gran parte del gobierno, numerosísimos parlamentarios, una completa representación de los poderes financieros e, incluso, la asistencia de muy altos dignatarios del país. Más allá de la anécdota, aquello revelaba una incuestionable sintonía entre las aspiraciones de la patronal y una política económica desarrollada por un gobierno concreto». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de gestión que presente la C.E.C. al V Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 17 y 18 de diciembre de 1992, sig.ant. C/46/14-18, pp. 9-10.

declararse *insumisa*, a cualquiera de las medidas que el Gobierno adoptará en adelante, y que, evidentemente, no le fueran favorables sus intereses. En concreto, se refería a la polémica normativa en relación a la Incapacidad Laboral Transitoria³¹⁶.

Por este camino, el allí denominado “Acuerdo Tercero” que se adoptaría en la Asamblea patronal de septiembre, marcaría todo un hito en la reciente historia del país. Todo un paso adelante, pues más allá de su contenido “radical” significaría en la práctica un sobresaliente punto de inflexión en la creciente soledad gubernamental con respecto a sus interlocutores más inmediatos:

«Autorizar a la Junta Directiva y a la Presidencia de la CEOE para que en colaboración con las Organizaciones confederadas articulen e instrumenten el compromiso de desarrollar colectivamente las medidas de oposición necesarias, con respecto a las leyes, ante decisiones del Gobierno o de los Sindicatos, que agraven los costes de las empresas y en especial los costes fiscales, sociales, laborales, financieros y los posibles excesos o abusos del sector público sobre la actividad de las empresas»³¹⁷.

Con todo, y a pesar de lo dicho, en el día a día las relaciones con el empresariado, y demás poderes fácticos, se mantuvieron en el tono de diálogo y comprensión mutua habitual –a través de “pactos expresos, o tácitos”³¹⁸ – a excepción de lo que ocurría en 1992. Se trataría

³¹⁶ Real Decreto-Ley, 5/1992, de 21 de julio, *de Medidas Presupuestarias Urgentes* [B.O.E. 23 de julio de 1992] En el epígrafe tercero de la *Exposición de Motivos* se señalaba: «En tercer lugar, se aborda una modificación de la prestación económica por incapacidad laboral transitoria, cambio que no implica una modificación del nivel de protección de los trabajadores, al tiempo que se establece una nueva modalidad de la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social, las cuales podrán efectuar esta colaboración respecto a dicha prestación económica, sin tener que colaborar en la asistencia sanitaria». Aunque sobre esta importante normativa en su conjunto se volverá más adelante, véase por el momento, LEONÉS SALIDO, José Manuel, “El abono del subsidio de incapacidad laboral transitoria tras el Real Decreto-Ley 5/1992 de 21 de julio”, *La Ley*, nº4, (1993), pp. 1063-1065.

³¹⁷ CEOE, *Acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de la CEOE*, Madrid, CEOE, 8 de septiembre de 1992, pp. 2, 4, 6, 7, respectivamente. La prensa rápidamente se haría eco de las importantes conclusiones de aquel encuentro. Por ejemplo: Noticia, “CEOE propondrá a los sindicatos mantener el empleo a cambio de sacrificios salariales”, *El País*, 9 de septiembre de 1992. De hecho, UGT al día siguiente, entre otras organizaciones políticas y sindicales, publicaría una nota de prensa a través de su Comisión Ejecutiva. Tras calificar de «vertiginoso cambio» la modificación de la propia actitud de la CEOE ante su oposición a la política económica, señalaba como en aquel «contexto resultan absolutamente impresentables las llamadas a la desobediencia civil lanzadas por la dirección de la CEOE». Concluyendo: «Resulta desconsiderado el permanente recurso de la patronal al sacrificio salarial en un país donde tenemos los salarios más competitivos de Europa y donde los trabajadores han tenido un comportamiento ejemplar de moderación, que en buena medida se ha despilfarrado en sus posibilidades de empleo». AHFFLC, UGT-CEC, “Nota de prensa”, Madrid, 9 de septiembre de 1992, sig. AI 320-05, pp. 1, 2, 3, respectivamente.

³¹⁸ SARTORIUS, Nicolás, “Dos años de gestión del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, *op.cit.*, p. 21. En cualquier caso, y como destacaría Carlos Rodríguez Braun, «Solchaga fue cordialmente detestado por los sindicatos, pero ovacionado por los empresarios en la Asociación para el Progreso de la Dirección». RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “Carlos Solchaga Catalán” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, *op.cit.*, p. 251. De hecho, las relaciones entre el Ejecutivo y la clase económica dominante, más allá de retóricas y declaraciones públicas, serían bastante fluidas. Y el mejor ejemplo lo tenemos, precisamente, en la estrecha vinculación entre la Asociación para el Progreso de la Dirección y Carlos Solchaga, que a la postre se convertiría en la *tribuna* más utilizada por el propio Ministro de Economía para ofrecer ‘jugosas’ declaraciones, véase, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, pp. 200-201. Asimismo es hartó significativo un auto-diálogo inventado por el propio Felipe González sobre estas fluidas relaciones con el mundo empresarial: «La gente no veía amenazado su estatus –no digo su privilegio, digo su estatus–y, entre los empresarios, la discusión, hasta hace muy poco tiempo, era: ‘¿Por qué os quejabais del Gobierno socialista, si nunca fuisteis más empresarios, más potentes, si nunca antes creasteis más empresas, disteis más dinero, expandisteis más vuestra capacidad,

entonces de marcar las oportunas distancias políticas antes que un enfrentamiento entre patronal-gobierno³¹⁹. Todo ello en un tiempo en que por más que los resultados electorales se mostrarán cada vez más adversos para los socialistas, no se vislumbraba aún su salida del poder político. De hecho, en aquellos años se crearía el *Club de Empresarios* de afiliación socialista y compuesto en no pocas ocasiones por militantes cuando no altos cargos socialistas, que se pasarían al ámbito del capital privado, como la mejor muestra del fluido intercambio de pareceres similares que se mantenían entre ambas partes³²⁰.

Por el contrario, las relaciones con los sindicatos y demás agentes sociales y políticos se caracterizarían por un rápido deterioro hasta el enfrentamiento total, tras la experiencia del 14-D³²¹. Por tanto, la concertación social durante la época socialista apenas fue en realidad un pequeño episodio –y no siempre completo– que duró en lo básico entre 1984/1985 a 1986, pues a pesar de negociarse a principios de los noventa el frustrado Pacto Social de Progreso –el último intento de concertación con los agentes sociales en la época socialista– el mismo tendría una efímera vida efectiva al ser incumplido, de forma reiterada, por el Gobierno, siendo finiquitado finalmente tras el *decretazo de 1992*³²².

Para uno de los principales protagonistas de este tiempo, Carlos Solchaga, en su particular reto de mantener como fue con la “racionalidad económica”, la política implantada le “parecía en aquellos momentos más imprescindibles que nunca”³²³. Por lo demás, en este

aunque se aumenta la presión fiscal y se redistribuyan los ingresos?»». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*

³¹⁹ Al respecto de la ruptura de la concertación social para 1991 al calor del *non nato* “Pacto Social de Progreso”, la UGT criticaría la estrecha *colaboración* entre Gobierno y CEOE, aunque como es lógico ambas partes negarían lo que venía resultando evidente para buena parte de la izquierda político-sindical desde hacía muchos años: «Por último, fue notoria en todo momento la completa sintonía –disfrazada bajo la forma de ‘neutralidad activa’– con la CEOE hasta el punto de que se puede hablar de una total complementación e intercambio de papeles. La inclinación claramente proempresarial de la administración tuvo el evidente efecto de fortalecer la posición de la CEOE que pasó a la ofensiva con pretensiones –ley de huelga, abaratamiento del despido, eliminación de autorización administrativa en los despidos, etc.– que en ese contexto constituían una auténtica provocación». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al IV Comité Confederal Ordinario. Gestión I”, Madrid, 28 y 29 de noviembre de 1991, sig.ant. A/40/02, p. 10. Véase al respecto lo señalado en su momento por el laboralista, PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos, “Concertación social y Plan de Convergencia con la Comunidad Europea: el agotamiento del segundo ciclo de Diálogo Social”, *Boletín del Círculo de Empresarios*, n° 55, (1992), pp. 57-68.

³²⁰ Véase al respecto: Noticia, Joaquín Estefanía, “El PSOE propicia el Club de Empresarios, una nueva organización de profesionales progresistas”, *El País*, 7 de abril de 1985. Por lo demás, y como destaca

³²¹ Nos remitimos aquí a “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

³²² Sobre todos estos episodios nos remitimos a la detallada descripción presentada por, GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, *op.cit.* y en concreto el apartado “5. La derecha económica no existe” (pp. 317-331). Para una visión sindical, VEGA, Rubén, “Entre la unidad sindical y crisis del sindicato de servicios” en *La reconstrucción del...*, *op.cit.*, pp. 255-275. Por lo demás, sobre el citado *decretazo* nos remitimos al apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

³²³ ALBARRACÍN, Jesús, *La economía de...*, *op.cit.*, p. 209. Para Carlos Solchaga su defensa de la política racional se basó en los siguientes argumentos: «No sólo por evitar burdos errores o no caer en el voluntarismo político, sino también porque nunca he entendido que se pueda hacer frente a responsabilidades de Gobierno si no es ejerciendo esa labor desde la racionalidad o justificando adecuadamente las desviaciones de lo que económicamente es razonable aludiendo a otros motivos y valoraciones superiores y distintas. Por otro lado, creo que una forma de resaltar la responsabilidad de la gobernación consiste precisamente en explicar y hacer pedagogía de la acción de Gobierno y no concibo ni una labor ni la otra si no es desde la racionalidad de las conductas». SOLCHAGA, Carlos, *El final de...*, *op.cit.*, p. 19 [sobre la ecuación político ideológica política económica=racionalidad dentro del

panorama de rápidos cambios y cuando se estaba seriamente deterioradas las relaciones con los sindicatos mayoritarios y maltrechas las conexiones con la patronal; sin embargo, el gobierno socialista seguiría contando con el aval de las grandes instituciones monetarias, encabezadas por el FMI. Aunque este *apoyo* no se tradujera en votos e inclusive su íntima conexión con tal institución no le reportará *buena prensa*, para los técnicos socialistas imbuidos profundamente de su propia retórica de la estrategia de la modernización, el aval del propio FMI era tanto más importante. Pues el obtener su respaldo estaba considerado como un elemento clave para no ver mermada la “confianza” de los mercados. Un aspecto del todo sintomático de por donde había transcurrido la política económica del país.

Siendo esto así, no se puede subestimar en modo alguno el alto valor que concedía el Gobierno a las evaluaciones que anualmente realizaban las conocidas “misiones” del FMI. Téngase presente que el FMI es un organismo público, aunque generalmente las conclusiones de sus misiones son secretas así como no se publican³²⁴. No obstante, algunos de estos documentos internos suelen llegar –por vías no esperadas– a manos del investigador³²⁵. Entre estos escasos ejemplos, contamos con las conclusiones de la misión del FMI de 1991. Si nos detenemos en este “ocasional” documento, tras toda esta breve introducción, es por la sencilla razón de que a través del mismo se puede comprobar fehacientemente la estrecha relación entre la política económica de los gobiernos socialistas y las directrices del FMI.

Tras casi diez años de la puesta en marcha de la estrategia de la modernización socialista, el FMI respaldaba el camino emprendido: “Se ha avanzado mucho desde mediados de la década de los años ochenta”; “[L]a Misión apoya decididamente la política actualmente desarrollada de otorgar prioridad al objetivo de convergencia en las tasas de inflación, manteniendo para ello una orientación muy restrictiva de la política monetaria”.

Para el Fondo Monetario Internacional, por más que se había avanzado en la liberación de la economía, siempre el camino orientado para la liberalización de la economía le parecía insuficiente, limitado. Por ello no dudaba en *recomendar* toda una pléyade de medidas profundamente liberalizadoras. *Medidas* que, en buena medida, serían acatadas y llevadas adelante por el Gobierno durante esta última etapa económica, que aquí se analizará: *incrementar la imposición indirecta, crecimiento de los salarios reales significativamente menor al de la productividad, incremento de la flexibilidad del mercado de trabajo*. En suma

discurso técnico socialista consúltese en el Capítulo 6, *nota 144* entre otras]. Como criticara en aquel contexto Fernando Esteve Mora una mínima observación de la realidad no ofrecía en modo alguno tan altas expectativas: «Del crecimiento del PIB, del moderado éxito de la política antiinflacionista y de la tímida recuperación en el empleo, se suele decir que si bien aún se está lejos del cumplimiento de los objetivos, las tendencias apuntadas son las correctas, señalan el dinamismo, la mayor eficiencia y productividad de la economía española, y, en consecuencia, justifican la continuidad de la política económica diseñada. A la luz de lo expuesto aquí, lo mínimo que se puede afirmar es que tales conclusiones son apresuradas ya que [...] los indicios existentes confirman la impresión de que la tendencia en este respeto no es nada buena». ESTEVE MORA, Fernando, “Crecimiento y bienestar. La economía que no está en el PIB” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, pp. 263-264.

³²⁴ Nos remitimos a lo apuntado al respecto en el Capítulo 6, *nota 206*.

³²⁵ El citado documento que recogía las conclusiones preliminares de la *misión* del FMI en aquel año, sería localizado, de forma casual, en el Archivo Histórico de la Fundación Largo Caballero a partir de una carta dirigida por el Secretario General de Economía Internacional y Competencia, José Juan Ruiz, al Secretario General de Acción Sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, en donde le agradecía la «colaboración con los economistas del FMI». AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Sindical, “Carta de José Juan Ruiz a Apolinar Rodríguez. Madrid, 24 de junio de 1991”, sig. 002902-003, que incluía en el anexo el documento, “Conclusiones de la Misión del FMI sobre España, 1991”. Sobre el papel del FMI se ha hablado previamente en el apartado “6.1.1. Puntos de partida”.

como concluía aquel informe: “[E]l Gobierno debería seguir adelante con los necesarios ajustes en la política fiscal y en las políticas estructurales y no dejar que aquéllas se debiliten”³²⁶.

España al concluir la *década del cambio* era un país más rico, pero el modelo por el que había optado mostraba todas sus insuficiencias como hemos destacado previamente. Quizás la más significativa sería la propia estructura empresarial, pues tras un prolongado proceso de atracción de los capitales extranjeros, se generaría una cultura empresarial que basaría su estrategia en una recogida de beneficios a corto plazo sin reinvertir la suficiente plusvalía en capital humano, físico y tecnológico. La *fe ciega* en que las inversiones por sí mismas generarían riqueza se vino abajo. No hubo un “resultado feliz”³²⁷. Como también se vendría abajo la firme creencia de que una vez conseguidos los equilibrios macroeconómicos, se alcanzaría la cuadratura del círculo y la economía funcionaria razonablemente por sí sola³²⁸. La tesis del libre mercado por el libre mercado se constataría como totalmente falsa así como la pretendida “modernidad progresista”, que tanto criticara el propio Nicolás Redondo para denunciar su carácter anti-social³²⁹.

En este mismo contexto mucho tuvo que ver la más que generosa política de subvenciones y facilidades fiscales y el deterioro de los derechos laborales de los trabajadores vía salarios, vía ordenamiento jurídico-laboral³³⁰. Así pues, mientras que la tasa de explotación alcanzaba cotas no vistas antes, el nuevo modelo económico naciente se mostraba escasamente productivo y guiado por la misma lógica que durante el franquismo: la intensificación del factor trabajo asalariado³³¹. Ni siquiera con la absorción en grandes cantidades de capital extranjero se

³²⁶ AHFFLC, FMI, “Conclusiones de la Misión del FMI sobre España, 1991”, sig. 002902-003, pp. 1, 3, 4, y 5, respectivamente.

³²⁷ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 68.

³²⁸ «Todo ello ha venido a mostrar que la reacción en cadena que se pretendía provocar (más excedente, más beneficio, más inversión, más empleo) no se ha dado en realidad: porque –como, por otra parte, era sabido– no todo excedente se convierte en beneficio dada la estructura económico-financiera de la empresa española, porque no todo beneficio se invierte cuando hay alternativas más rentables, como la especulación en cualquiera de sus formas, o porque no toda inversión es generadora de puestos de trabajo». TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, op.cit., p. 41. En todo caso, desde el Gobierno, o fuera de él, pasado un tiempo no se dejaría de insistir en lo que se evidenciaría durante toda la *década del cambio* como algo no factible, no viable. Así por ejemplo, el mismo Carlos Solchaga no se cansaría de repetir en sus ‘memorias’ como el principal objetivo del Gobierno socialista sería el de «construir un estado de bienestar que pudiéramos financiar sin producir desajustes y cuyo funcionamiento no impidiera o dificultara el crecimiento económico y la creación de empleo». SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, op.cit., p. 23.

³²⁹ REDONDO, Nicolás, “Modernidad y progreso social”, *Leviatán*, nº 25, (1986), pp. 5-16. Texto que recogía una intervención en el Club Siglo XXI el 1 de diciembre de 1986.

³³⁰ El sindicato socialista UGT llegaría a denunciar públicamente lo siguiente: «El panorama favorable para los empresarios desde el punto de vista del mercado flexible para contratar se completa con el chorro de bonificaciones, desgravaciones fiscales y subvenciones que reciben de distintas fuentes». Añadiendo: «Es incalculable el número de ayudas que un empresario puede recibir a la hora de hacer una contratación». AHFFLC, UGT, “Reflexiones de UGT para un compromiso de progreso por el empleo”, Madrid, 1988, sig. 001874-002, p. 37. Véase también lo apuntado en el Capítulo 6, nota 232.

³³¹ «Se rompía, así, el esquema oficial: la recuperación de la tasa de beneficio, que incluía la política salarial, no empujaba la acumulación; la que se realizaba, se dirigía a la racionalización de la producción y el ahorro de puestos de trabajo, y no al aumento de la capacidad productiva. Por el contrario, los efectos de la política de austeridad y ajuste deprimían la economía agravando aún más la evolución de la acumulación y el empleo». ALBARRACÍN, Jesús, “La extracción del excedente y el proceso de acumulación” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 325. Consúltense asimismo los datos ofrecidos por, ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ de BUSTILLO LLORENTE, Rafael, “La política económica...”, op.cit., pp. 18-ss.

podía compensar la escasa competitividad del sistema³³². O explicado en otros términos, al final del trayecto el modelo económico no había significado una mayor ni una mejor redistribución de la renta³³³. Para los socialistas buena parte del problema se concentraba en la inexistencia de un nuevo *pacto social* de tintes interclasistas, que a la postre hubiera servido de modelo de distribución, aunque poco o nada se hablara de las consecuencias de sus propias políticas económicas³³⁴. En esta situación, y como se quejaría agriamente la propia UGT, para el gobierno socialista nunca era el momento propicio para iniciar la redistribución:

«Según el criterio del Gobierno, no parece ser el momento oportuno para redistribuir: en tiempos de crisis había que colaborar para salir de ella, en el relanzamiento de la economía había que esperar a que la tarta creciera, en fase de crecimiento era imposible porque se recalentaba la economía, ahora tampoco es posible porque se avecina una recesión. Para este Gobierno nunca es el momento de la solidaridad; desde luego, en una política conservadora nunca hay sitio para la distribución»³³⁵.

Retornando al mundo de lo económico se mirara por donde se mirara, a nivel macro, los datos empezaban a ser realmente alarmantes a partir de 1990³³⁶. No tardaron en llegar viejas-

³³² Para un balance global, HUERTAS, Emilio (ed.), *Los desafíos de la competitividad: la innovación organizativa y tecnológica en la empresa española*, Bilbao, Fundación BBVA, 2002. Y sobre las políticas empleadas a nivel europeo en esta dirección, PFALLER, Alfred, GOUGH, Ian y THERBORN, Göran (comps.), *Competitividad económica y Estado de Bienestar: estudio comparativo de cinco países avanzados*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1993.

³³³ Balances generales a tener en cuenta en una primera aproximación, MILLÁN PEREIRA, Juan Luis, “La distribución de la renta” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara..., op.cit.*, pp. 51-90, junto con el balance clásico de, ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, “Política de rentas”, *Información Comercial Española*, n° 676/677, (1989-1990), pp. 51-58, dentro del dossier monográfico, *Cincuenta años de economía española: 1939-1989*. Para una comparación internacional el estudio impulsado por la OIT, LECAILON, Jacques, *Distribución de la renta y desarrollo económico. Estudio analítico*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987. Y también, KORZENIEWICZ, Roberto P. y MORAN, Timothy P., “World Economic Trends in the Distribution of Income, 1965-1992”, *American Journal of Sociology*, vol. CVII, n° 4, (1997), pp. 1000-1039. Por su parte consúltese el siguiente informe patrocinado por el Banco Mundial: MILANOVIC, Branko, “True World Income Distribution, 1988 and 1993: First calculation base on Household surveys alone”, *Policy Research Working Paper*, n° 2244, (1999).

³³⁴ A partir de un discurso socialdemócrata *aderezado* con los necesarios datos especialmente seleccionados para la ocasión, Matilde Fernández, Ministra de Asuntos Sociales, diría: «Lo que se ha producido en los años ochenta ha sido un nuevo contrato social para ampliar y adecuar explícitamente los límites de la redistribución, un nuevo contrato en el que amplios estratos de las clases medias y de las clases trabajadoras que aspiran a un nivel de representación social más elevada puedan considerar la posibilidad de introducir nuevos programas y servicios para atender a las nuevas necesidades sociales y para hacer frente a las actuales causas de marginación». FERNÁNDEZ BLANCO, Matilde, “Las políticas sociales en la década de los ochenta. Importancia y vigencia de las políticas de bienestar social” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del..., op.cit.*, p. 234.

³³⁵ AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Sindical, “La alternativa socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica”, Madrid, a 15 de septiembre de 1990, sig. 001880-001, p. 4. Se señalaba al principio de aquel documento lo que en los siguientes años se convertiría en la demanda más sentida y repetida por parte de la UGT: «El abandono de la política conservadora no sólo constituye una exigencia social sino también una solución económica, abriendo camino a una política socialdemócrata que conjuga equidad social y eficiencia económica». *Ibidem*, p. 1.

³³⁶ Un crudo análisis en torno a las fortalezas y debilidades del modelo económico español es el coordinado por entre otros por quien fuera Secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza. Nos referimos a la obra de, MOLINAS, César, SEBASTIÁN, Miguel y ZABALZA, Antonio (eds.), *La economía española: perspectivas macroeconómicas*, Madrid, Antonio Bosh / Instituto de Estudios Fiscales, 1991. Por su parte la UGT de Nicolás Redondo denunciaría en estos primeros compases de la crisis que se avecinaba a toda prisa como es «el alarmismo injustificado e interesado el que puede generar expectativas de depresión». Señalando, por lo demás, como la «política de ajuste anunciada por el Gobierno pretende crear las condiciones de una crisis artificial [...]. Insistir en una política de

nuevas recetas de la OCDE entre otros organismos mundiales económicos³³⁷. Se confirmaría rápidamente como las primeras medidas para *enfriar* la economía van a resultar infructuosas³³⁸. Los tres principales indicadores que hemos venido empleando así lo evidencian. El PIB registraría una variación anual del 3,8%, 2,5% y del 0,9% para 1990, 1991 y 1992. Incluso durante al año siguiente en lo más duro de la crisis se llegaría a una cifra no conocida: -1%. Junto con la caída del Índice de Producción Industrial (IPI) a niveles no registrados desde principios de los años ochenta, el déficit público pasa del 3,5% al 4,2% en tan sólo un año, rompiendo así una tendencia a la baja en anteriores ejercicios económicos. La posterior subida de una décima para 1991 evidenciaría las dificultades por la que atraviesa el Gobierno en aquellos dos años cuando el gasto social crecería a un ritmo, en cualquier caso, moderado. En lo que respecta a la inflación tras haber alcanzado la elevada cifra del 6,8% en 1989 en plena euforia de la demanda interior –impulsada, en gran medida, por el auge inmobiliario de aquellos años tras la aprobación del conocido Real Decreto-Ley de 2/1985, el “Decreto-Boyer”³³⁹– y que hacía presagiar la vuelta tiempos no tan lejanos, difícilmente podrá ser controlada en adelante. Aunque ya no se alcanzarán las cifras de finales de los setenta ni de la primera parte de la década de los ochenta, lejos, muy lejos, quedará la inflación del país con respecto al objetivo del 3% que se establecerá en el Tratado de Maastricht: 6,7% para 1990, 5,9% para 1991, y la misma cifra para el año siguiente.

La consecuencia más directa de esta nueva crisis será la destrucción masiva de empleo entre 1991 y 1993, que lleva a que la tasa de desempleo oficial pase del 16,3% al 22,7%. En 1994 se llegaría al 24,7%. Las señales de agotamiento tampoco terminan ahí. La demanda interior decrece rápidamente, primero, ante los señales de crisis y luego motivada por una política monetaria sumamente restrictiva. Para los años que estamos analizando en lo que respecta a la demanda interior, está baja del 7,6% de 1989 al 4,6% para 1990, produciéndose un descenso acusadísimo durante los dos siguientes años: un 2,9% y un 1,4% para 1991 y 1992, de forma respectiva. En 1993 se macaría otro nuevo record estadístico: la demanda interior presenta un resultado negativo del tamaño del -3,4% del total del PIB.

Todo lo anterior tendrá su rápida y oportuna traslación a las importaciones y exportaciones, junto con las consecuencias *ad hoc* para el saldo comercial exterior. En lo que respecta a las importaciones las variaciones anuales serán 8,1%, 9,4% y 6,8% para los tres años aquí analizados. Igualmente 1993 presenta un dato esclarecedor en este campo: -3,2%. En lo que respecta a las exportaciones -4,2%, 8,4%, 6,4% respectivamente para 1991, 1992 y 1993– la caída será mucho menos acentuada. Con un saldo exterior rondando tasas negativas del tres por ciento -3,5%, -2,9%, -3,3% para los años citados– el resto de las variables macroeconómicas –principalmente la Formación Bruta de Capital Fijo³⁴⁰– presentarán igualmente señales de agotamiento de este breve pero intenso periodo de recesión económica.

enfriamiento económico generará más paro y hará más difícil la adaptación de nuestra economía a la nueva estructura de costes». AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Sindical, “La alternativa socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica”, Madrid, a 15 de septiembre de 1990, sig. 001880-001, p. 6.

³³⁷ Consúltense, entre otros, los dos siguientes informes: OECD, *OECD Economic Surveys of 1991-1992. Spain*, Paris, OECD, 1992; id., *OECD Economic Surveys of 1992-1993*, Paris, OECD, 1993.

³³⁸ «Hace años el Gobierno inició una errónea política de enfriamiento inútil [...]. Tanto el déficit comercial como la inflación tienen causas estructurales, y muy poco se puede lograr con políticas restrictivas de demanda. El resultado está a la vista, apenas se han corregido los desequilibrios citados, pero sí se ha introducido a la economía en una senda de recesión con crecimientos negativos del PIB y un incremento de la tasa de desempleo que supera todos los récords». MARTÍN SECO, Juan Franciso, “Quiebra del modelo económico español” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, op.cit., p. 146.

³³⁹ Remitimos a las *nota* 82 y siguientes.

³⁴⁰ «El menor crecimiento económico se ha debido fundamentalmente a que la inversión ha sufrido un fuerte descenso, derivado de las negativas consecuencias de la política de enfriamiento, y del elevado

Con tal cuadro por delante, sin embargo, no se modificó la orientación política en sus postulados básicos como venimos insistiendo. La reacción gubernamental se basó en el mantenimiento de los ajustes que se emprenden a la altura de 1989. Las medidas adoptadas van a estar más orientadas a subsanar los principales equilibrios macroeconómicos, con las mismas recetas que a realizar reformas estructurales destinadas a una posible modificación del tejido productivo³⁴¹. En todo caso, tras años de planificación económica a corto plazo, presupuesto por presupuesto, previsión por previsión, a partir de la presentación del *Programa de Convergencia, 1992-1996* por parte del Gobierno se procede, de nuevo, a elaborar una política a medio plazo³⁴².

En este caso, se trataría de un plan de un lustro de duración. ¿*Un plan de ajuste o reformas estructurales?* se llegaría a preguntar el economista Joaquim Novella³⁴³ ante un proyecto económico caracterizado, desde un primer instante, por su imprecisión programática³⁴⁴. Un programa elaborado por Carlos Solchaga y su equipo y sin apenas variaciones sustanciales en términos de economía política³⁴⁵. La propia cronología que acompaña al citado *Programa*, tanto en lo referido a su puesta en marcha, su discusión parlamentaria y social así su posterior aprobación por parte del ECOFIN, son reveladoras de un contexto marcado por un amplio proceso de reformas –*reforma del mercado de trabajo* y

tipo de interés y las restricciones de crédito impuestos por el Gobierno. Así frente al 13% de aumento de la formación bruta de capital fijo en 1989, el año pasado este crecimiento se redujo a un 6,7%». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al IV Comité Confederal Ordinario. Gestión I”, Madrid, 28 y 29 de noviembre de 1991, sig.ant. A/40/02, p. 4.

³⁴¹ Una visión sobre este periodo desde el seno de las filas socialistas en, RODRÍGUEZ LÓPEZ, Julio, “El último ciclo de la economía española”, *Leviatán*, n° 50, (1992), pp. 21-30, dentro del dossier monográfico dedicado a *La década del cambio*.

³⁴² Para su contenido, desarrollo, actualizaciones correspondientes y en concreto de cara a sus proyecciones macroeconómicas y resultados véanse: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, *Programa de convergencia: Madrid, marzo de 1992*, Madrid, [s/d.], 1992; id., *Actualización del Programa de convergencia*, Madrid, [s/d.], 1994. Sobre su grado de cumplimiento entre otros muchos trabajos ‘oficiales’: MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO, “Grado de cumplimiento de los criterios de convergencia (primer semestre de 1994)”, *Boletín Económico de ICE*, n° 2421, (1994), pp. 1947-1951; ANDRÉS, Javier y DOMÉNECH, Rafael, *La convergencia real con Europa*, [Madrid], Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Planificación, 1995 A lo que debe añadirse la actualización realizada en 1994 por parte del Consejo Económico y Social en base a la solicitud efectuada por el mismo Ministerio de Economía y Hacienda. El resultado de todo ello sería un documento clave para interpretar las principales características y recorrido del propio *Plan de Convergencia*: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, “Dictamen del Consejo Económico y Social sobre la actualización del Programa de Convergencia”, Madrid, 21 de septiembre de 1994 [*Dictamen 6/1994*].

³⁴³ NOVELLA, Joaquim, “El Programa de Convergencia y la Unión Económica y Monetaria: ¿Un plan de ajuste o reformas estructurales?”, *Afers Internacionals*, n° 25, (1993), pp. 37-56.

³⁴⁴ Véase, Noticia, “El colegio de economistas critica la imprecisión del plan de convergencia”, *El País*, 14 de mayo de 1992. Igualmente como recordaría la CEC de UGT, tan sólo cuatro días después de presentarse el *Programa de Convergencia* se ponía «ya de manifiesto la imposibilidad de que se cumpla la previsión del Programa de Convergencia (¡7 de abril!) sobre déficit público». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de gestión que presente la C.E.C. al V Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 17 y 18 de diciembre de 1992, sig.ant. C/46/14-18, p. 6. En esta línea, aunque partiendo desde diferentes planteamiento y posiciones político-académicas: GÁMIR, Luis, “Convergencia y credibilidad”, *Economistas*, vol. X, n° 53, (1992), pp. 21-23. Véase aquí el amplio trabajo de, CONTRERAS GARCÍA, Delia, *Análisis del tratamiento periodístico de las negociaciones de Maastricht en la prensa española*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2004.

³⁴⁵ Trabajos realizados en esta línea desde el núcleo del ‘Equipo de Solchaga’: DEHESA, Guillermo de la, “El Programa de Convergencia”, *Boletín Económico de la ICE*, n° 2324, (1992), pp. 1529-1530, así como por parte del propio SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad... op.cit.*

concretamente de las prestaciones por desempleo³⁴⁶ – y también de sonados conflictos y controversias³⁴⁷. Un escenario político, en suma, bastante similar en no pocos aspectos al que se produciría en 1983/1984 en relación a la trayectoria seguida por el *Programa Económico a Medio Plazo*.

Pero ya entonces con un Gobierno –quien no dudaría en seguir empleando similares recursos político-discursivos como los utilizados en su día durante el proceso del Tratado de Adhesión de 1986, tanto de cara al *Programa de Convergencia* como en relación al Tratado de la Unión³⁴⁸– no sólo debilitado electoralmente sino también cuestionada, inclusive, su propia legitimidad política –por cuestiones que iban desde los constantes como sonados casos de corrupción a otras tantas cuestiones relacionadas con su forma de gobernar– no dejaría de recibir notables y fuertes críticas por parte de todos los implicados. Todo ello, por y a través de un continuado proceso de aislamiento y soledad política así como parlamentaria. Pero es que además el *Programa de Convergencia* no puede interpretarse, de forma precisa, sin tener presente que al mismo tiempo de su negociación y desarrollo, en paralelo, se discutiría el

³⁴⁶ Coincidente con la aprobación en el mismo Consejo de Ministros del *Programa de Convergencia* se iniciaba también la andadura político-jurídica de la reforma laboral de 1992 [Real Decreto-Ley 1/1992, de 3 de abril, de *Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo*]. Una ‘vuelta de tuerca’ en el camino de la flexibilidad, que entonces se vería apoyada argumentalmente por nuevos *pretextos*. Véase su cerrada defensa por parte del Gobierno en, Noticia, “Solchaga defiende la flexibilidad laboral como pieza básica de la convergencia con Europa”, *El País*, 28 de marzo de 1992. Tan sólo unos meses más tarde se convocaría una huelga general –el 28 de mayo de 1992– contra dicha reforma precisamente en el momento de discusión parlamentaria del *Programa de Convergencia*. Sobre sus intentos de reconducción (y paralización) por parte del Gobierno: Noticia, “Serra pide a los sindicatos desconvocar el 28-M”, *El País*, 13 de mayo de 1992; Noticia, “Los sindicatos responden a González reafirmando la huelga general”, *El País*, 13 de mayo de 1992. Al respecto nos remitimos a lo apuntado en la *nota 41*.

³⁴⁷ A continuación se expone la cronología que seguiría el citado *Programa de Convergencia*: 1) 27 de marzo de 1992 se aprueba el mismo en el Consejo de Ministros; 2) el 2 de abril de 1992 se remite a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas; 3) 12 y 13 de marzo de 1992 discusión parlamentaria en el Congreso de los Diputados; 4) 3 de junio de 1992 el Comité Monetario de la UE estudia el proyecto; y 5) 9 de junio de 1992 se aprueba el mismo por parte del ECOFIN. En cuanto a su recorrido en las Cortes Generales resulta de una considerable relevancia seguir dos de las intervenciones en 1992 por parte del propio Carlos Solchaga en relación al *Programa de Convergencia*: CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES. COMISIONES MIXTAS PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *Comparecencia, a petición propia, del señor Ministro de Economía y Hacienda (Solchaga Catalán), para informar sobre el Programa de Convergencia Económica*, IV Legislatura, nº 36, 7 de abril de 1992 (número de expediente 214/000063), pp. 909-923; CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE, *Programa de Convergencia Económica. Intervención del Ministro de Economía y Hacienda (Solchaga Catalán)*, IV Legislatura, nº 186, 12 de mayo de 1992 (201/000003), pp. 9124-9161. En lo que se refiere a su impacto mediático así como sus repercusiones y contestaciones en dos de las fechas centrales de tal proceso (marzo y mayo de 1992) véanse las siguientes noticias y editoriales del principal periódico de la nación. Para marzo: Noticia, “La inversión debe crecer más que la economía con el objetivo de crear un millón de empleos en cinco años”, *El País*, 28 de marzo de 1992; Noticia, “El PP califica el plan de convergencia de ser «lo peor del liberalismo»”, *El País*, 29 de marzo de 1992. Y para mayo en donde cobraría una especial importancia las enmiendas de contenido fiscal en la tramitación parlamentaria del citado *Programa*: Noticia, “El Gobierno acepta modificaciones fiscales para tener el apoyo de los nacionalistas al plan de convergencia”, *El País*, 13 de mayo de 1992.

³⁴⁸ De notable importancia el trabajo de, INCHAURRALDE BESGA, Carlos, OLIVARES RIVERA, Carmen, VÁZQUEZ ORTA, Ignacio y GUILLÉN CALVE, Ignacio (eds.), *El discurso de la convergencia europea en los textos sobre el Tratado de Maastricht. Un recorrido pragmatolinguístico por algunos textos periodísticos e institucionales británicos y españoles*, Zaragoza, Egido, 1996.

Tratado de Maastricht, que marcará un antes y un después tanto en la vida económica como política del país³⁴⁹.

El objetivo de llegar a la creación del Mercado Único el 31 de diciembre de 1992 en las mejores condiciones posibles, dará lugar a una carrera contrarreloj en términos económicos. Aquí de nuevo todas y cada una de las previsiones de aquel *Plan* irá decayendo, a la par quedaban totalmente alejadas de la propia realidad económica³⁵⁰. Una *carrera* por la

³⁴⁹ Sobre su tramitación parlamentaria véase: CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE. *Proyecto de Ley por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992*. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 98.1, de 10 de septiembre de 1992, IV Legislatura, nº 216, 1 de octubre de 1992, pp. 10608-10651; y Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciembre, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992 [B.O.E. 29 de diciembre de 1992. Entrada en vigor, 30 de diciembre de 1992]. Sobre todo este proceso histórico existen numerosas referencias [téngase presente, al mismo tiempo, la bibliografía citada y empleada en el apartado “6.2.4. El embrujo de la retórica europeizante”]. Para los argumentos ‘institucionales/oficiales’, SERRA i SERRA, Narcís, *España y el Tratado de Maastricht* [Conferencia del Excmo. Sr D. Narcís Serra, Vicepresidente del Gobierno, en la Institución Fernando el Católico], Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1993; referencias para seguir este proyecto desde versiones ‘favorables’ a este proceso en el dossier monográfico de *Papeles de Economía Española*, nº 52-53, (1992) dedicado a tal asunto. A destacar los textos de, BOIXAREU, Ramón, “El tratado de Maastricht: Génesis, estado actual y perspectivas” (pp. 2-17); y, GAZZO, Emanuele, “El largo camino hacia la construcción de Europa” (pp. 32-38). A lo que necesariamente ha de sumarse dos números monográficos de *Información Comercial Española*. El primero sería el nº 710, (1992), y entre otros artículos, véase el firmado por, GALLASTEGUI ZALAICA, M^a del Carmen, “Los acuerdos de Maastricht y el Plan de Convergencia: una visión crítica” (pp. 101-114); y el segundo sería el nº 820, (2005) con los siguientes –entre otros– trabajos: FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato, “Modelo Económico de la Unión Europea: fundamentos y limitaciones” (pp. 3-10); o, VIÑALS, José, “El modelo económico y social europeo: ¿una trinidad inconsistente?” (pp. 55-72). Todo ello junto con el número monográfico de *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 17, (1992), dedicado a *La Europa Social después de Maastricht*. Reseñar los siguientes artículos desde posiciones opuestas/enfrentadas: JIMÉNEZ DE AGUILAR, Juan, “La política social después de Maastricht” (pp. 57-60); ZUFIAUR, José M^a, “Luces y sombras de la nueva dimensión comunitaria” (pp. 61-73). Y en lo que respecta a visiones ‘críticas’ y/o ‘distantes’ entre una amplia bibliografía: MONEDERO, Juan Carlos (comp.), *El retorno a Europa: de la perestroika al Tratado de Maastricht*, Madrid, Editorial Complutense, 1993; MONTES, Pedro, *La integración en...*, op.cit.; CAPARRÓS, Rafael (ed.), *La Europa de Maastricht*, Málaga, Universidad de Málaga, 1994; FUNDACIÓ PERE ARDIACA, *Maastricht y el futuro de Europa*, Barcelona, Serbal, 1997. En cualquier caso ha de reseñarse como sería el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, desde donde se opondrían las mayores resistencias al citado *Tratado de Maastricht* durante su fase parlamentaria, lo que a la postre le ocasionaría no pocos conflictos internos [véase para esta cuestión, RAMIRO FERNÁNDEZ, Luis, *Cambio y adaptación...*, op.cit.; PANIAGUA, Juan Luis y RAMIRO FERNÁNDEZ, Luis, *Voz, conflicto y salida: un estudio sobre faccionalismo. Nueva Izquierda, 1992-2001*, Madrid, Editorial Complutense, 2003; y, OTERO CARVAJAL, Luis Enrique, “Izquierda Unida: un dilema imposible” en BUENO LLUCH y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coords.), *Estrategias de alianza...*, op.cit., pp. 276-313]. Sobre este mismo núcleo de ‘oposición’ consúltase el número monográfico de *Utopías: Nuestra Bandera*, nº 168, (1996), titulado: *Europa ante su futuro*. A destacar: ANGUITA, Julio, “España ante la Unión Europea” (pp. 15-28); JÓVE PERES, Salvador, “La reforma del Tratado de Maastricht. Aspectos económicos. ¿Qué Europa queremos?” (pp. 77-86). Para una visión de conjunto, MORENO JUSTE, Antonio, “El proceso de construcción europea: de la CEE al Tratado de Maastricht” en PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos (coord.), *Historia de las relaciones internacionales contemporáneas*, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 561-584; y, finalmente, CARDONA LLORENS, Jorge, “El Tratado de Maastricht: un hito en la historia de la construcción europea” en FORNER MUÑOZ, Salvador (ed.), *La Construcción de Europa: de las “guerras civiles” a la “unificación”*, Madrid / Alicante, Biblioteca Nueva / Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2007, pp. 115-128.

³⁵⁰ Referencias centrales para seguir esta misma realidad desde posiciones totalmente divergentes a las tesis pro-gubernamentales en: MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno:

convergencia económica, en donde los tiempos políticos del proyecto modernizador se acelerarían según se aproximaba la gran fecha.

Tras ratificar en 1987 el Acta Única Europea que preveía como horizonte la instauración del Mercado Único no más allá de 1993, el calendario de proyectos, propuestas, recomendaciones y medidas se irá estrechando a un considerable ritmo. En junio de 1988 el Consejo Europeo encargaría al entonces Presidente de la Comisión de la CEE, Jacques Delors, un informe sobre cómo y por dónde llegar a la *fundación* del citado Mercado Único³⁵¹. Discutido y aprobado un año después durante la Presidencia Europea española, daba comienzo el inicio de la Unión Económica y Monetaria a partir del 1 de julio de 1990. Ratificada en la conocida Cumbre de Roma a finales de ese mismo año –diciembre de 1990– los dos años siguientes estarán repletos de acontecimientos trascendentales. Primero, durante la reunión europea de ministros de Economía y Hacienda en Luxemburgo en mayo de 1991, se aprobarán las matrices de los programas de convergencia, lo que desatará no pocos debates políticos ante las condiciones expuestas; segundo, ya en la ciudad de Maastricht los días 9 y 10 de diciembre de aquel mismo año se cierra el aparato político-socioeconómico de la actual UE, el Acuerdo de Unión Monetaria. Firmado el 7 de febrero de 1992 tanto por los Ministros de Exteriores como de Economía por los entonces doce países comunitarios, sería ratificado en septiembre de aquel mismo año³⁵².

Cuando se procede a examinar el contenido del citado *programa de convergencia*, el mismo recoge no sin dificultades, cuando no con palpables contradicciones, todos los acuerdos aprobados en las reuniones citadas. ¿Qué señalaban aquellos acuerdos? En lo básico un conjunto de valores macroeconómicos, a partir de los cuales se consideraba que la convergencia europea podía y debía ser factible. No obstante, y como sucedió en la década de los ochenta, aquello constituía la nueva versión de unas políticas de ajuste implementadas por los *Programas Económicos a Medio Plazo*, a partir de los cuales (teóricamente) los reequilibrios macroeconómicos situarían por sí solos la economía al entorno europeo. De este modo, y bajo el reto de que la inflación no superara el 3,1%, los tipos de interés no superaran el 10,8%, la deuda pública no superara el 60% del PIB o el déficit público no superara el 3% del PIB, entre otras no pocas medidas, vendría la posterior justificación de las decisiones “necesarias” aunque “impopulares” que el Gobierno tenía que adoptar en adelante.

crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara..., op.cit.*; BOIX, Carles, *Partidos políticos..., op.cit.*

³⁵¹ Consúltese necesariamente las bases, estrategias y metas que se establece en el conocido *Libro Blanco de Delors* en, COMISIÓN EUROPEA, *Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI: Libro Blanco*, II vols., Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1993.

³⁵² En primer término para la consulta del citado *Tratado* nos remitimos a la cuidada edición de, *Tratado de la Unión Europea: texto íntegro y test*, Madrid, CEP, 2009. Consúltese también el trabajo institucional de, SECRETARÍA DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *La Unión Europea: breve introducción al Tratado de Maastricht*, Madrid, Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas / Comisión de las Comunidades Europeas Oficina en España / Boletín Oficial del Estado, 1992. Sobre todo este proceso así como sus contenidos jurídicos-normativos véanse los siguientes trabajos: ARCOS VARGAS, M^a Cruz, *De la Comunidad a la Unión Europea: El Tratado de Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992*, Sevilla, UNED-Centro Asociado de Sevilla, 1992; ROMERO, José J. y RODERO, Adolfo (dirs.), *España en la CEE: del Acta Única al Tratado de Maastricht*, 2^a ed., Córdoba, Etea, 1996; ALONSO OLEA, Manuel [et al.], *España y la Unión Europea: las consecuencias del Tratado de Maastricht*, Madrid, Círculo de Lectores / Plaza & Janés, 1992. Y finalmente: FUENTE PASCUAL, Félix de, *Glosario jurídico-político de la Unión Europea*, Madrid, Tecnos, 2002.

A partir de tales *desafíos* se combinarían una serie de medidas en un solo camino posible. No sin razón se habló de la “coacción la convergencia con Europa”³⁵³. Y como en otros no muy lejanos tiempos, se volvería a reclamar –en esta ocasión incluso el propio Felipe González se volcaría personalmente en tal petición de forma todavía más intensa que en 1985– con más fuerza discursiva que con real convicción la vuelta al dialogo social y al siempre deseado objetivo de la concertación social³⁵⁴. Las razones básicas: la no *necesidad* de remar todos al mismo ritmo. Una vez más se está ante el camino de lo “inevitable”³⁵⁵. Y, también, no se escatimaron costes ni esfuerzos destinados a la “liberalización” y “desregulación” del mercado. Reducir el sector público empresarial con la continuación de la venta de importantes empresas públicas, de cara a fomentar las condiciones necesarias para abrir el mercado español a las siempre esperadas inversiones, se constituyó en su más expresiva consecuencia³⁵⁶.

En todo caso, el problema real que se ocultaba tras aquellas medidas en busca de la convergencia con Europa, es que se pretendió recorrer –o mejor dicho dar el último y gran “salto histórico”³⁵⁷– a toda velocidad, al precio que fuera aprovechando el conocido como

³⁵³ TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, op.cit., p. 34.

³⁵⁴ Pero para aquellas alturas no es que hubieran quemado todos los puentes de diálogo o entendimiento con los sindicatos, sino es que también la *ruptura* de la familia socialista parecía irreversible mientras estuvieran en sus respectivos cargos las mismas direcciones que habían protagonizado el *sonado* divorcio. En esta coyuntura, cualquier llamada al *diálogo social* despertaba profundos temores y recelos. Así, por ejemplo, tiene interés el contenido de la contestación de Felipe González a una carta de Nicolás Redondo dos meses después de la huelga del 28 de mayo, en donde la parálisis, la distancia, en suma, entre Gobierno y fuerzas sindicales mayoritarias acerca de un nuevo marco de diálogo social constituía la tónica dominante. *Sorprende*, antes de nada, el trato distante, el tono prácticamente burocrático, que se deriva de las palabras del Presidente del Gobierno: «Coincido en su apreciación sobre la trascendencia que en estos momentos tiene el diálogo social, cuando nuestro país se halla ante un programa de crecimiento sostenido a medio plazo [...]. Pienso, por mi parte, que la mayoría de los ciudadanos españoles conscientes de los importantes retos que dicho proyecto implica, desean que el diálogo social pueda culminar en acuerdos concretos y en el desarrollo de un clima favorable a la consecución de los objetivos previstos en el Programa de Convergencia». Insistiendo por lo demás como en «relación con el Programa de Convergencia en su conjunto, al que Vd. se refiere en su carta, creo que serían de gran utilidad unas conversaciones detalladas sobre su contenido y sus implicaciones [...]. Conseguir un acuerdo de esta naturaleza contribuiría decisivamente a la consolidación de la paz social que constituye un bien en sí mismo, y factor importante para los avances económicos y sociales». AHFFLC, “Carta de Felipe González a Nicolás Redondo”, Madrid, 22 de junio de 1992, sig. 1600-003, pp. 1 y 2, respectivamente.

³⁵⁵ Muy sintomático en este sentido, DEHESA, Guillermo de la, “Por qué el ajuste es inevitable”, *Economistas*, vol. X, nº 54, (1992), pp. 10-14. Desde otra perspectiva pero en la misma línea, BORRELL, Josep, “El papel del Estado en la economía y en la salida de la crisis”, *Sistema*, nº 117, (1993), pp. 5-18.

³⁵⁶ Como recordaron Joaquín Arriola y Luciano Vasapollo: «En el caso de los países de la OCDE [...] cerca de los tres cuartos de las operaciones de inversión en el exterior han tomado la forma de operaciones de adquisición o de fusión de empresas existentes o bien de mutación de propiedad del capital existente, a menudo seguidas de reestructuraciones del proceso productivo, que han determinado desocupación sin creación de nuevos medios de producción; y en donde ha habido inversiones productivas no ha disminuido necesariamente la desocupación, más bien al contrario. En muchos mercados las tasas de concentración mundial son análogas a las de hace treinta años, típicas de las economías cerradas». ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, op.cit., p. 62. Consúltense en la misma obra el cuadro titulado: “Distribución por regiones de las filiales de las 100 mayores empresas multinacionales no financieras por país de origen. Porcentajes 2002” (p. 89).

³⁵⁷ Expresión habitualmente empleada en los medios socialistas. Por ejemplo en, AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, p. 14. En otros documentos internos inclusive se iría un paso más: «Esta valoración viene avalada por la evolución de múltiples indicadores que confirman que a lo largo de los últimos diez años la sociedad española ha dado un espectacular salto adelante en su nivel

estudiado efecto *catch up* o *efecto convergencia*³⁵⁸. Y todo ello sin tener presente que el diferencial existente en áreas como la económica y la social eran, en la práctica, insalvables, por lo que finalmente “la convergencia nominal conlleva implícita la divergencia real”³⁵⁹. La idea del *sorpasso europeo* se demostró totalmente falta³⁶⁰. Así pues, la puesta en marcha del *Programa de Convergencia* que venía a cerrar una década de intensas reformas, en el tiempo aquí objeto de estudio, mostraría –ahora ya en un contexto comparado a nivel internacional– las limitaciones y debilidades de un modelo europeo de crecimiento, a través de una apuesta poco novedosa en lo teórico y todavía menos efectiva en la praxis.

La crucial fecha de 1992 –otra de aquellas efemérides bisagras de nuestra contemporaneidad y denominada por los socialistas como el *horizonte del noventa y dos*³⁶¹– constituía un espacio temporal a la par que simbólico, en donde confluían todo tipo de anhelos y deseos para los gobernantes y técnicos socialistas³⁶². Tras diez años, la etiqueta de la *década del cambio* para algunos socialistas se quedaría corta y se pasaría a denominarla como la “*década del progreso y democracia*”³⁶³. No faltaron tampoco las conmemoraciones oportunas³⁶⁴. Como

de bienestar». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria de gestión de los órganos federales [al] 33º Congreso del PSOE. Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo de 1994, sig. Fc 1378, p. 24. Véase la *nota 3* así como el tantas veces comentado trabajo de, ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*, p. 56.

³⁵⁸ Véase aquí, ESCOT MANGAS, Lorenzo y GALINDO MARTÍN, Miguel Ángel, “Evidencia empírica de la convergencia real”, *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 3, (2000). Y unos años antes, MARTÍN GONZÁLEZ, Carmela, “La convergencia real en Europa: un referente clave para la política económica española”, *Papeles de Economía Española*, nº 63, (1995), pp. 2-17. Así como el más extenso trabajo de, GÁMIR, Luis (dir.) y PEINADO PÉREZ, José Luis (coord.), *La convergencia real de la economía española*, Madrid, PricewaterhouseCoopers, 1999.

³⁵⁹ TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p.35. Sobre este mismo aspecto, LABORDA PERALTA, Ángel, “La convergencia nominal como base de la UEM y de la convergencia real: retos para la economía española” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, *op.cit.*, vol. VIII, pp. 425-484. Y desde otra perspectiva del todo aclaratoria, TURRIÓN, Jaime y VELÁZQUEZ ANGONA, Francisco J., “El largo camino de la convergencia real de la economía española con la Unión Europea”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 183, (2004), pp. 40-47.

³⁶⁰ Véase la bibliografía apuntada en la *nota 180*, junto con, COMÍN, Francisco, “La difícil convergencia de la economía española: un problema histórico”, *Papeles de Economía Española*, nº 63, (1995), pp. 78-92.

³⁶¹ AHFPI, PSOE-CE, “Memoria Política y de Gestión de la CEF (1988-1990). 32º Congreso. Madrid 9-11 Nov. 1990”, Madrid, noviembre de 1990, sig. Fc 912. Por lo demás, consúltese la siguiente publicación conmemorativa, muy relevante del discurso político socialista del momento: PSOE, *Por el futuro de todos*, Madrid, PSOE, 1992.

³⁶² Es relevante en términos históricos acercarse a las esperanzas y/o anhelos que tanto desde el Gobierno como desde el Partido se depositaron en esta fecha. Sin posibilidad de ser exhaustivo –junto con toda la bibliografía partidista y la documentación primaria ya citada, en donde destaca la promovida por la Fundación Sistema (GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*;) y por la Fundación Pablo Iglesias (dossier monográfico *Leviatán*, nº 50, (1992), *La década del cambio*)– consúltese un ejemplo sumamente revelador: BARÓN, Enrique, “El horizonte del 92 y la izquierda”, *Leviatán*, nº 36, (1989), pp. 21-32.

³⁶³ TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 53.

³⁶⁴ Quizás la más significativa sería la campaña *Diez años de futuro* organizada por los socialistas andaluces, y cuya presentación tendría lugar a menos de cuatro días de la huelga general de 1992 y en medio de no pocos escándalos de corrupción, sumado a una deteriorada coyuntura económica. Una campaña destinada, en suma, a promover la que se quiso identificar como la nueva *estética socialista*, y cuyo acto central sería un ‘gran’ mitin en Sevilla un 24 de mayo de 1992. Sobre las cifras de asistencia, de movilización de militantes, no faltó la habitual batalla de cifras. Representativo tanto de las

no faltaron tampoco las oportunas reclamaciones de mayores apoyos electorales para seguir modernizando por lo menos el país el país durante diez años más³⁶⁵.

No sólo era la celebración de la Exposición Universal en Sevilla, el V Centenario del siempre mal llamado descubrimiento –o en su versión latinoamericana del “reencuentro”– de América, las Olimpiadas en Barcelona, la capital cultural europea en Madrid o la propia creación del Mercado Único, por citar algunos de los eventos de aquel año; lo que aquella fecha podía significar o no significar era la constatación del éxito de las políticas no sólo (aunque sí principalmente) económicas, sino sobre todo de un proyecto de Gobierno, de Partido, de Poder³⁶⁶. Y todo ello al coste económico que fuera³⁶⁷. En otras palabras, se buscaría implantar en la ciudadanía la “conciencia colectiva del logro”³⁶⁸. Superada la efervescencia reformista de la primera mitad de la década de los ochenta, el continuismo de la segunda mitad, la década de los noventa retoma en parte muchos de los impulsos del cambio del ochenta y dos, aunque,

expectativas del acto como del ambiente conflictivo de aquellos momentos: Noticia, “El PSOE moviliza a 40.000 militantes para el mitin de González y Guerra en Sevilla”, *El País*, 24 de mayo de 1992; y Noticia, “50.000 gorras para 6.000 cabezas”, *El País*, 25 de mayo de 1992, en donde se cifraba los asistentes en 6.000 personas muy lejos de las previsiones iniciales. Y de cara a entender la tensión político-sindical-social de aquellos momentos véase asimismo: Editorial, “Qué sea pacífica”, *El País*, 24 de mayo de 1992 en relación a la propia convocatoria de Huelga General. Al respecto el sociólogo James Petras no dudaría en señalar al respecto: «The regime’s attempt to mobilize a counter-demonstration in Seville a few days prior to the strike was abysmal failure: less than 15,000 loyalist turned out (less than one third of those expected) to hear President González and ex-Vice President Guerra, despite free bus transport and free tickets to attend Expo 1992». PETRAS, James, “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y id. (eds.), *Mediterranean Paradoxes...*, *op.cit.*. Por lo demás en octubre de aquel mismo año tendría lugar la principal celebración de los diez años en el poder por parte de los socialistas. Al igual que en el acto de mayo, de nuevo, las interpretaciones tanto políticas como en relación a las cifras distaron sobresalientemente de quién –o quiénes– y desde dónde se leyeran tales ‘celebraciones’. A lo que venía a añadirse una cuestión no menor: la creciente división en el seno del partido como describieron la mayoría de las crónicas periodísticas del momento. Consúltase el suplemento especial de 44 páginas publicado por *El País* el 28 de octubre de 1992, en donde se deben destacar los siguientes reportajes-artículos: PRADERA, Javier, “Un cambio de doble filo”; ESTEFANÍA, Joaquín, “La obsesión de un hombre”. Junto con el Editorial, “Panorama con tiempo nublado”. Celebración coincidente con otros importantes acontecimientos: primero con la llegada de la “Marcha Negra” a Madrid con cerca de 30.000 mineros; y segundo, con la aprobación en aquella misma semana en el Parlamento de la votación del Tratado de Maastricht: Noticia, “El Congreso da luz verde por abrumadora mayoría al Tratado de la Unión Europea”, *El País*, 30 de octubre de 1992.

³⁶⁵ Noticia, “González pide otros 10 años de gobierno socialista para modernizar España”, *El País*, 26 de octubre de 1992.

³⁶⁶ Consúltense las cifras del estudio de, ATIENZA, Julián y POMBO, M^a Nieves, *España y los acontecimientos de 1992*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992.

³⁶⁷ Según datos del economista Jaime Requeijo se calcula que la Exposición Universal de Sevilla de 1992 tuvo un coste de 1,2 billones de pesetas; los Juegos Olímpicos, 230.000 millones de pesetas. Por tan sólo apuntar dos de los datos más significativos. REQUEIJO, Jaime, *España en deuda, 1975-1995*, Madrid, McGraw-Hill, 1977, pp. 82-ss. Para una contextualización oportuna de aquellos momentos: SOTELO, Ignacio, “El retablo de las maravillas”, *El País*, 13 de mayo de 1992. Otra vez más, José Díez Herrera e Isabel Durán han ido un paso más lejos en su particular investigación. En un capítulo de su obra tantas veces citada, se explica con todo lujo de detalles como se montaría la denominada ‘Sociedad Estatal Expo-92’. La lista de corruptelas, favores y otros tipos de delitos es, sencillamente, interminable. Pero no sólo, pues, las extendidas sospechas delictivas que se cernían en torno a sus supuestos responsables, llevarían a los mismos a borrar todo tipo de información. A ello se sumaría todo una serie de amenazas, más o menos veladas, para quienes intentaron perseguir tales fraudes: «Altos cargos del Gobierno de Felipe González participaron aparentemente en la operación de encubrimiento, encaminada a hacer desaparecer papeles y borrar todas las huellas que pudieran implicar al PSOE en el cobro de comisiones ilegales». DÍAZ HERRERA, José y DURÁN, Isabel, *Pacto de silencio...*, *op.cit.*, p. 227, y en concreto, el capítulo 8, “Expo: Faraónica la obra, monumental la corrupción” (pp. 227-252).

³⁶⁸ GARCÍA DELGADO, José Luis, “Modernización económica y...”, *op.cit.*, p. 30.

ciertamente, desde unas bases políticas pero también de legitimidad ya considerablemente mermadas.

El panorama al que se enfrentan los gobiernos socialistas difiere, y mucho, del inicio de su proyecto. Más allá del desgaste electoral-político, de las crecientes críticas procedentes de las Cortes Generales ante el presidencialismo ejercido de *facto* por Felipe González³⁶⁹, de las querellas y enfrentamientos partidistas, rápidamente va ir cobrando una mayor importancia tanto política como mediáticamente los casos de corrupción. El que se conocería en la prensa a partir de noviembre de 1984 como el *caso Flick*³⁷⁰ –aunque el mismo no tuviera relación con el Gobierno socialista, aunque sí con la financiación del PSOE durante la transición postfranquista³⁷¹– tendría la “virtud”, a pesar de no ser en estricto sentido un caso propiamente de corrupción, de posibilitar la apertura de un debate *político* antes que *social* por parte de la derecha del país en relación a la *honradez* de los socialistas. Pero lo cierto es que pasados unos años no dejarían de sucederse –ahora sí– graves casos de corrupción: desde el *caso Filesa*³⁷² el *caso Ibercorp*³⁷³ o el “caso Guerra”³⁷⁴. Una corrupción institucional/personal que afectaría con tanta fuerza a los socialistas hasta el punto que supondrían un duro golpe a la credibilidad de la clase política en su conjunto³⁷⁵. En breve, no se dejaría de mencionar el famoso eslogan socialista de finales de los setenta: *Cien años de honradez*³⁷⁶.

³⁶⁹ El mejor retrato desde las filas socialistas sobre este extendido fenómeno en, TEZANOS, José Félix, “Populismo, corporativismo, neo-bonapartismo”, *Sistema*, nº 129, (1995), pp. 11-24. Por su parte, James Petras dibujaría la relación del Gobierno y del Partido con la sociedad a la altura de finales de los años ochenta de la siguiente forma: «Inmensos en el mundo férreamente controlado por el aparato del partido, convencidos de sus propios mitos, mofándose constantemente de las minorías en el parlamento, los socialistas creían tener el mundo en sus manos». PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, op.cit., p. 18.

³⁷⁰ Una síntesis oportuna sobre el *caso Flick* la encontramos en, POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., pp. 413-ss, quien a cita a su vez el interesante trabajo de, PINTO-DUSCHINSKY, Michael, “Foreign political aid: German political foundations and their US counterparts”, *International Affairs*, vol. LXVII, nº 1, (1991), pp. 33-63. Por su parte los dirigentes socialistas –tanto en este caso como en los otros dos ejemplos expuestos (*Filesa* y *Ibercorp*)– en rara ocasión han entrado en mayores detalles, limitándose a una crítica general y generalista sobre el ‘mal’ de la corrupción. Junto al trabajo global de, ORTUÑO ANAYA, Pilar, *Los socialistas europeos y...*, op.cit.; de nuevo es de enorme interés la voz socialista disidente (e histriónica en pocos casos) de, SAAVEDRA, Antón, *Secuestro del socialismo...*, op.cit..

³⁷¹ Véase lo apuntado en el apartado “4.2.1. La consolidación de una *nueva coalición del poder* (1972-1977)”, y en concreto la investigación de, MUÑOZ SÁNCHEZ, Antonio, *El amigo alemán...*, op.cit..

³⁷² Nos remitimos a, AMALIBIA, Jesús M^a, *El Barbero de Filesa*, Madrid, Grupo Libro 88, 1993; y, GALIACHO, Juan Luis y BERBELL, Carlos, *Filesa. Las tramas del dinero negro en la política*, Madrid, Temas de Hoy, 1995. Y en términos doctrinales: MORENO-TORRES HERRETA, M^a Rosa, “Las falsedades documentales en el código penal de 1995. A propósito de las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1997 (caso Filesa) y 26 de febrero de 1998 (caso Argentaria Trust)”, *Actualidad Penal*, nº 46, (1999), p. 46.

³⁷³ El libro clave y que en suma vendría a desenmascarar el citado caso de corrupción sería el de CACHO, Jesús y GARCÍA-ABADILLO, Casimiro, *La estafa: Ibercorp y el fin de una era*, 2^a ed., Madrid, Temas de Hoy, 1992. Por lo demás no deje de consultarse los *parciales* recuerdos de uno de los implicados: RUBIO, Mariano, *Mis memorias. Testimonio...*, op.cit..

³⁷⁴ Véase lo ya apuntado en el Capítulo “5. Gabinetes «tecnocráticos» y «liberales» para los nuevos tiempos”.

³⁷⁵ En lo que respecta a la ‘corrupción generalizada’ durante los gobiernos socialistas, el llamado *periodismo de investigación* ha aportado numerosas y contrastadas pruebas del tal hecho. Una corrupción en ocasiones desde el propio Gobierno o en otras desde sus cercanías más próximas. Todo un fenómeno a valorar adecuadamente en una joven democracia, pues el continuo goteo de *casos* tras *casos*, terminaría por llevarse por delante buena parte de las *esperanzas* depositas en la promesa de regeneración ética y

Descrito el marco de operaciones político, las debilidades del modelo económico pero también los retos a los que se tuvieron que enfrentar los ejecutivos socialistas, ahora sí se puede afirmar que el gasto presupuestario, y por tanto las líneas programáticas económicas, sufrirán un giro perceptible. Conviene, en cualquier caso, establecer dos fechas fronteras entre 1990/1991 y 1992 y los años siguientes, de cara a examinar la propia política presupuestaria socialista en esta tercera y última etapa. Dos subetapas marcadas por contextos radicalmente diferentes tanto en lo político como en lo económico. Primero, vendría un “parcial” *giro* motivado, en lo básico, por el denominado “pago de la deuda social” y segundo, se produciría, a continuación, otro *nuevo giro* ahora derivado por el cumplimiento de los “criterios de convergencia”.

Con respecto al primero *giro*, el impulso social quedaría en la práctica reducido a un primer paquete de medidas que irían sucesivamente desinflándose. Medidas siempre consideradas *muy peligrosas* y que coincidirían con una “desaceleración cada vez más evidente de la economía española”³⁷⁷. En relación a los criterios de convergencia, en un cada vez más difícil equilibrio entre la nueva práctica discursiva socialdemócrata de los inaugurados noventa y los nuevos principios de realidad, los mismos condicionaran finalmente las orientaciones presupuestarias³⁷⁸.

Los PGE aprobados para el año 1990 –Ley 4/1990, de 29 de junio, de *Presupuestos Generales del Estado para 1990*³⁷⁹– y una vez puesto en marcha lo que se denominaría como el “pacto global de competitividad”, van a inaugurar una nueva etapa económica, acompañada de toda una serie de novedades político-jurídicas.

social que el socialismo se encargaría en su momento de liderar. Igualmente esta *literatura* ha dejado sobrada constancia de los estrechos vínculos entre los socialistas y las élites del poder. Nombre por nombre, día por día, dato por dato... Esta ‘otra historia’ aunque generalmente se tiende a enmarcarla en un abstracto apartado de la ‘corrupción socialista’, sin embargo, resulta muy aclaratoria tanto de la forma de gobernar, de la dirección de la política económica así como de la conocida ‘cultura del pelotazo’ de la que se habló en su momento. De hecho, es tal la cantidad de datos, de pistas, de evidencias, que podría reescribirse otra historia paralela del socialismo desde esta perspectiva. A modo de ejemplo, véanse entre otros muchos, los trabajos no siempre reconocidos de: DÍAZ HERRERA, José y TIJERAS, Ramón, *El dinero del...*, *op.cit.*; GONZÁLEZ URBANEJA, Fernando, *Banca y poder...*, *op.cit.*; TORRES, Andrés, *La financiación irregular...*, *op.cit.*; JANER, Miguel, *Todo queda en familia: cien años de oligarquías en España*, Madrid, La Esfera de los Libros, 1993; DÍAZ HERRERA, José y DURÁN, Isabel, *Los secretos del poder: del legado franquista al ocaso del felipismo. Episodios inconfesables*, Madrid, Temas de Hoy, 1994; YNFANTE, Jesús, *Los muy ricos. Las trescientas grandes fortunas en España*, Barcelona, Grijalbo, 1998; SÁNCHEZ SOLER, Mariano, *Ricos por la patria. Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia*, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, y de este mismo autor, id. *El libro negro...*, *op.cit.*. Y en concreto, DÍAZ HERRERA, José y DURÁN, Isabel, *Pacto de silencio...*, *op.cit.*. Asimismo consúltese el ya citado trabajo de, LAMO DE ESPINOSA, Emilio, “Corrupción política y ética económica” en TUSELL, Javier, LAMO DE ESPINOSA, Emilio y PARDO, Rosa (Eds.), *Entre dos siglos...*, *op.cit.*. Por lo demás, véase lo apuntado en el apartado “2.2.9. Las obras periodísticas: una gran base de datos por explorar”.

³⁷⁶ Como destacaría Javier Pradera: «De ahí que las denuncias de algunos casos de corrupción de militantes socialistas, relacionadas para mayor escándalo con la financiación ilegal del partido, hayan provocado una auténtica conmoción». PRADERA, Javier, “Las pasiones del poder: el PSOE tras diez años de Gobierno” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, *op.cit.*, p. 268.

³⁷⁷ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, pp. 436 y 437, respectivamente.

³⁷⁸ Sobre esta cuestión consúltese el trabajo clave de, SCHARPF, Fritz W., *Crisis and Choice...*, *op.cit.*.

³⁷⁹ Ley 4/1990, de 29 de junio, de *Presupuestos Generales del Estado para 1990* [B.O.E. 30 de junio de 1990]. Véase, SOLCHAGA, Carlos, “Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 1990”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 15-54 [discurso pronunciado en el pleno del Congreso de los Diputados un 27 de marzo de 1990]; y de, ZABALZA, Antonio, “El Presupuesto y su contexto económico”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 57-62

Asimismo debe remarcarse que los mismos serán finalmente aprobados a mediados de año. Un hecho que no ocurría desde los PGE de 1983, dadas las peculiares circunstancias políticas que se concitaron en aquellos momentos. Por tanto, la causa, tal como se indica en su *Exposición de Motivos*, sería la “imposibilidad de aprobar la nueva ley de Presupuestos antes del 1 de enero de presente ejercicio económico”³⁸⁰. La tardía fecha en que se celebrarán las elecciones generales correspondientes a la IV Legislatura –un 29 de octubre de 1989– junto con toda una serie de episodios judiciales –antes que estrictamente políticos– estarán tras este retraso presupuestario³⁸¹. Por cierto la propia Ley 4/1990 sería duramente atacada, y el Partido Popular presentaría un recurso contra su Disposición final décima, y también contra el Real Decreto-Ley 5/1990, de 20 de diciembre, *de medidas fiscales urgentes*³⁸². Precisamente, la elaboración de tales medidas explicaría la tardía elaboración de los PGE³⁸³.

De esta forma, la normativa, a efectos prácticos, que realmente ha de destacarse es la Ley 5/1990, *sobre medidas en materia presupuestaria, Financiera y Tributaria*, procedente previamente del Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, a través de los cual se habían prorrogado los presupuestos³⁸⁴. A partir de aquí, ha de certificarse como se procede a partir de ese momento al cierre de la reforma del aparato fiscal, así como se constata el afán gubernamental de llevar a cabo una reordenación del gasto en base a las prioridades políticas y económicas que va demandando la nueva acuciante situación³⁸⁵. Un primer como esperado síntoma de *reacción*. Mientras tanto, la preocupación por el déficit público y la inflación siguen presentes, mostrando a su vez la manifiesta incapacidad de generar medidas de choque de tipo de contra-cíclico en un momento de desaceleración económica profunda³⁸⁶.

³⁸⁰ Consúltase aquí: LOZANO, Diego, “Algunas consideraciones jurídicas sobre la prórroga del presupuesto de 1989”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 199-210.

³⁸¹ Nos remitimos de cara a los mismos a lo apuntado en el apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”, y en concreto a la *nota 249* y otras.

³⁸² Real Decreto-Ley 5/1990, de 20 de diciembre, *de medidas fiscales urgentes* [B.O.E. 21 de diciembre de 1992].

³⁸³ Primero, véase, Noticia, “El PP recurre ante el Constitucional los presupuestos de 1990 y la prórroga del IRPF”, *El País*, 2 de octubre de 1990. El TC dictaría sentencia cuatro años después: TC. SENTENCIA 146/1994, de 12 de Mayo, *del Pleno del Tribunal Constitucional en los Recursos de Inconstitucionalidad 1791, 2091 y 2132/1989, 645 y 2282/1990 y 636/1991, promovidos contra diversos preceptos de la Ley 20/1989, de 28 de Julio, de adaptación del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio, y Contra diversos preceptos de la Ley 20/1989, de 28 de julio, de Adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, y el cuarto, quinto y sexto, por más de 50 Diputados del Grupo Popular contra determinados preceptos del Real Decreto-ley 7/1989, de 23 de diciembre, de la Ley 5/1990, de 29 de junio, y del Decreto-ley 5/1990, de 20 de diciembre*. Sobre su recorrido y contenido: LÓPEZ CARBAJO, Juan Manuel, “La sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de mayo de 1994: validación constitucional de la Ley 20/1989, 28 de julio”, *Crónica tributaria*, nº 71, (1994), pp. 143-155.

³⁸⁴ Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, *sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria* [B.O.E. 30 de diciembre de 1989], por el cual se prorrogan los citados presupuestos; y la Ley 5/1990, de 29 de junio, *sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria* [B.O.E. 30 de junio de 1990]. Al respecto véase el oportuno trabajo de, SANZ GADEA, Eduardo, “Comentarios a la Ley 4/1990, *de presupuestos generales del Estado para 1990* y Ley 5/1990, *de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria*”, *Estudios financieros*, nº 89, (1990), pp. 3-18.

³⁸⁵ Sobre esta cuestión consúltase el epígrafe titulado, “Contrarreforma fiscal” en MARTÍN SECO, Juan Francisco, *La Pinza...*, *op.cit.*, pp. 243-265.

³⁸⁶ Léase con atención lo planteado en su día por, FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “El déficit público: ¿Problema o instrumento?”, *Leviatán*, nº 45, (1991), pp. 5-16, quien negaba la hipótesis aquí planteada.

Por lo demás, el pago de la *deuda social* se constatará especialmente en las partidas a la *Seguridad Social* –se pasa de un presupuesto de 5.628.146.376 miles de ptas. para 1989 a 6.585.276.289 miles ptas. para 1990– *Promoción social* –de 347.315.133 miles de ptas. a 405.084.813 miles de ptas. para los mismos años– *Sanidad* –1.578.751.911 miles ptas. a 1.854.816.521 miles ptas.– y *Educación* –716.958.633 ptas. a 824.313.421 miles de ptas.–³⁸⁷.

Todos estos movimientos, tanto en lo referido al gasto social como a la consecución de los equilibrios macroeconómicos, tienen su prolongación presupuestaria en 1991 una vez confirmada los indicios de la crisis económica. Ahora bien, las “ambigüedades gubernamentales” se impondrán nuevamente³⁸⁸. Así Carlos Solchaga en el Club de Empresarios afirmaría en ese mismo año, “[l]a situación no es buena, aunque en mi opinión es difícil que pueda empeorar”³⁸⁹. Declaraciones dentro y fuera del parlamento que llegarían a ser calificadas por parte de la UGT como un “ejercicio clásico de funambulismo”³⁹⁰.

En aquel ejercicio fiscal el incremento del gasto social se desacelerara, ante las limitaciones presupuestarias que comienza a imponer la anunciada crisis económica. En una situación presupuestaria cada vez más preocupante, una vez más las “previsiones económicas del gobierno resultaron ser excesivamente optimistas y los ingresos, aunque crecientes en términos reales, no pudieron compensar un gasto público acelerado”³⁹¹. Una crítica en boca de Carles Boix que se repetiría por buena parte de la academia liberal y que ponía el acento en el incremento de los gastos sociales, aparecen como los culpables directos del crecimiento de la

³⁸⁷ Léanse los datos ofrecidos por, JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Jaime, “La Seguridad Social en 1990: el presupuesto del consenso social”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 75-96; GODÉ SÁNCHEZ, José Antonio, “Los gastos sociales en el Presupuesto de 1990”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 131-144; y, más en concreto, GONZÁLEZ-PARAMO, José Manuel y ROLDÁN ALEGRE, José M^a, “La orientación de la política presupuestaria en España: evolución reciente y perspectivas de convergencia”, *Papeles de Economía Española*, nº 52-53, (1991), pp. 167-179.

³⁸⁸ Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1991* [B.O.E. 28 de diciembre de 1991] Y de nuevo, SOLCHAGA, Carlos, “Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 1991”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 4, (1991), pp. 13-28 [discurso pronunciado en el pleno del Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 1990]; ZABALZA, Antonio, “La Política Fiscal y las demandas sociales en el Presupuesto de 1991”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 31-42. Y dentro de mismo número de la revista citada, véase también el trabajo del entonces Secretario General de Planificación y Presupuestos, VIÑUELA DÍAZ, Julio, “Objetos básicos de la Política Económica del Presupuesto de 1991” (pp. 43-48). Por último, SOLCHAGA, Carlos, “1991: las lecciones de la presunta mediocridad”, *Economistas*, vol. X, nº 52, (1992), pp. 38-42.

³⁸⁹ Declaraciones procedentes de, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 162.

³⁹⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al IV Comité Confederal Ordinario. Gestión I”, Madrid, 28 y 29 de noviembre de 1991, sig.ant. A/40/02, p. 8.

³⁹¹ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 224. Por su parte desde la UGT no se dudaría en calificar el año mil novecientos noventa y uno como un «año de gran desorientación». Y con respecto a los presupuestos se destacaría la «mala presupuestación para 1991 y los peores resultados económicos han hecho necesario un ajuste presupuestario a medios de año, y mientras se apostaba públicamente por una modernización económica, el recorte afectaba de manera fundamental al gasto en inversiones e infraestructuras». Añadiendo finalmente, «los Presupuestos para 1992 reflejan una política continuista, sin desarrollar medidas adicionales que aumenten el bienestar social y perdiendo la posibilidad de modernizar nuestro tejido industrial de cara a 1993». Y en relación a las siempre fallidas previsiones del Gobierno señalaría con fina ironía: «Cuando las previsiones oficiales de inflación, salarios y empleo están ya desacreditadas, el Gobierno se aventura alegremente a asegurar posibilidades de creación de empleo con una exactitud que raya en el absurdo [...] [L]os escenarios gubernamentales se creen capaces de aventurar datos con un horizonte de cuatro años, aunque incapaces de concretar la evolución del empleo para 1991». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al IV Comité Confederal Ordinario. Gestión I”, Madrid, 28 y 29 de noviembre de 1991, sig.ant. A/40/02, pp. 2, 3, y 7-8, respectivamente.

inflación, del déficit público y del creciente desequilibrio en las cuentas³⁹². Por lo demás, en relación al sistema fiscal la ofensiva desde el Ministerio de Economía resulta evidente³⁹³.

Por otro lado, y como se ha adelantado, será través del Real Decreto-Ley 5/1990, cuando las autoridades declaran que tienen por intención una revisión y actualización normativa del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, que, en breve, devendrán en claves en línea con la adaptación de la normativa tributaria europea³⁹⁴. Normativa que sería duramente atacada por toda la izquierda del Gobierno por considerarla claramente regresiva³⁹⁵.

De cara a los PGE de 1992, nuevamente, todas “las previsiones fallaron estrepitosamente”³⁹⁶. Asimismo las críticas se dirigieron hacia el mismo lado, pues según la lectura oficial/clásica, el,

«creciente déficit público de finales de la década de los ochenta, resultado de la incapacidad del gobierno de recortar las transferencias sociales o incrementar los impuestos y al mismo tiempo conservar el apoyo de sectores clave del electorado, tuvo consecuencias de primer orden sobre la política económica a seguir por [Felipe] González»³⁹⁷.

Más allá de la permanente culpabilización implícita hacia el gasto social –tras caracterizarse desde el mismo Gobierno a los *presupuestos* del noventa y dos como *sociales* (siguiéndose aquí una inmutable lógica pre-establecida desde hacía cerca de un lustro)³⁹⁸ – con

³⁹² La contracara de este ‘discurso’ en: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Antonio, “Los salarios en los últimos años: entre la culpabilización y el remedio de todos los males”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25-26, (1994), pp. 258-268, dentro del número monográfico, *El coste del factor trabajo*.

³⁹³ Véase aquí, BORRELL, José, “De la Constitución a Europa: una década de política fiscal”, *Información Comercial Española*, nº 680, (1990), pp. 9-37; y nuevamente, ZALBALZA, Antonio, “La Política Fiscal...”, *op.cit.*.

³⁹⁴ Real Decreto-Ley 5/1990, de 20 de diciembre, *de medidas fiscales urgentes*. E igualmente téngase presente el examen de quien llegará a ser Ministro de Hacienda en tiempos populares, MONTORO, Cristóbal, “Crisis y renovación de la política fiscal española” en *El debate macroeconómico ante la Unión Monetaria*. Dossier monográfico, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 24, (1992), pp. 48-71. Asimismo desde las posiciones gubernamentales, ZABALZA, Antonio, “La reforma del IRPF y el impuesto de Patrimonio: sus objetos y elementos principales”, *Cuadernos de Actualidad de Hacienda Pública Española*, nº 6, (1991), pp. 149-155.

³⁹⁵ «[E]l gobierno ha procedido a una disposición impositiva de carácter regresivo y a la paralización de la lucha contra el fraude fiscal, que redundará en unos menores ingresos». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al IV Comité Confederal Ordinario. Gestión I”, Madrid, 28 y 29 de noviembre de 1991, sig.ant. A/40/02, pp. 2-3.

³⁹⁶ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 224. Y de nuevo consúltese, SOLCHAGA, Carlos, “Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 6, (1991), pp. 7-24. Como señalaran con una clara intensidad Carmen Tomás e Ignacio Alonso: «Carlos Solchaga se vio forzado a modificar hasta siete veces sus previsiones macroeconómicas –léase el año 1992– gracias a su obstinado empeño en defender posiciones radicales en materia de salarios, déficit público y precios. La tozuda realidad le venció [...]. Para muestra, un botón. En los últimos cinco años las desviaciones del presupuesto de gastos del Estado no bajaron del 7 por ciento de media anual. Estos errores acabaron por convertir en papel mojado en una ley básica para reconocer las prioridades del Gobierno y para saber cuál es el destino de los impuestos de los españoles». TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, pp. 152-153. Por lo demás véase el documentado trabajo de, LEAL, Teresa y PÉREZ, Francisco J., “Análisis de las desviaciones presupuestarias aplicado al caso del presupuesto del Estado”, *Documento de Trabajo del Banco de España*, nº 0933, (2010), junto con el análisis de, VALIÑO CASTRO, Aurelia, EDO HERNÁNDEZ, Valentín y PABLOS ESCOBAR, Laura de, “Las desviaciones presupuestarias en el período 1975-1995”, *Papeles de Economía Española*, nº 68, (1996), pp. 36-43.

³⁹⁷ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, pp. 224-255.

³⁹⁸ Desde la UGT consumada la ruptura y en una situación ya no de alejamiento sino de total enfrentamiento, reforzado tras la huelga general de mayo de aquel mismo año, se remarcaba en un

respecto al Sistema Tributario puede constarse la conclusión del *giro fiscal* que venía proyectándose: la adaptación del presupuesto a lo que se denomina en aquellos momentos como el “nuevo entorno económico europeo”, ahora ya en línea con el *Programa de Convergencia*³⁹⁹.

A lo que también se añadiría la introducción de algunas tipificaciones normativas en el entorno del ámbito socio-laboral de cierto calado jurídico y objeto de debate doctrinal⁴⁰⁰. Nos situamos ante la aprobación de la Ley 31/1991, de 20 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1990*. Una normativa en la que con el fin deseado de lograr una “paulatina aproximación a los niveles de desarrollo de los países comunitarios”, se repetirán recetas de todos conocidas: “un programa presupuestario que recoge el control de la inflación y del déficit exterior”. En suma, se procede a una “reestructuración del gasto, procurando conseguir una mayor eficacia y más racional utilización de los recursos disponibles”⁴⁰¹.

Se cierra una década de gobierno bajo similares constantes y preocupaciones que habían rodeado a los primeros ejercicios presupuestarios. Con otra nota añadida no menor. A saber, la profundización de la estrategia de la modernización ya en una tercera fase: la de la internacionalización *avanzada y/o definitiva*. Para lo cual se “plantea la necesidad ineludible de incrementar de forma significativa nuestra eficacia productiva y competitividad”⁴⁰². Una nueva

informe de gestión de su Comisión Ejecutiva Confederal: «Empecemos por recordar nuestra postura ante los Presupuestos Generales del Estado para 1.992, frente a las afirmaciones gubernamentales de que eran extraordinariamente ‘sociales’, por el porcentaje dedicado a gastos sociales que contenían. Como en su día declaramos, ese porcentaje no obedecía realmente a mejoras sociales sino a meros estabilizadores automáticos (más desempleo, rotación por precariedad, etc.)». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de gestión que presente la C.E.C. al V Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 17 y 18 de diciembre de 1992, sig.ant. C/46/14-18, p. 1. Aquí también consúltase la dura crítica de, CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CCOO, *Situación económica y presupuesto del Estado para 1992: octubre 1991*, Madrid, Confederación Sindical de CCOO / Secretaria de Información y Publicaciones, 1991.

³⁹⁹ Se reconocería implícitamente en los documentos del treinta y tres congreso socialista, las dificultades para continuar con la política económica seguida hasta ese momento, todavía más tras la aprobación del *Programa de Convergencia*: «Por lo que, el margen de maniobra disponible para la política económica se ha reducido hecho que se acrecienta con la intensificación de las políticas restrictivas ocurrido en toda Europa». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria de gestión de los órganos federales [al] 33º Congreso del PSOE. Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo de 1994, sig. Fc 1378, p. 19. No obstante, líneas atrás no había dudado en calificar los resultados finales de los Presupuestos Generales como bastante positivos. Consúltase, primero, el documento institucional: GOBIERNO DE ESPAÑA, *Presupuestos Generales del Estado 1992 y adaptación de normas tributarias a la legislación de la CEE*, Barcelona, Difusora de Normas Jurídicas, 1992; y en segundo lugar, los trabajos de, SÁNCHEZ REVENGA, Jaime, *Presupuestos Generales del Estado y aspectos básicos del presupuesto general de la CEE*, Barcelona, Ariel, 1989; y, SEBASTIÁ, Mª Teresa, “El Presupuesto General de las Comunidades Europeas para 1990 y sus efectos en los Presupuestos General del Estado”, *Presupuesto y gasto público*, nº 2, (1990), pp. 211-228.

⁴⁰⁰ Consúltase, GARCÍA NINET, José Ignacio, “Final de una controversia jurisprudencial y doctrinal: la inclusión en la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, de las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo y fondo de garantía salarial”, *Tribuna Social*, nº 14, (1992), pp. 29-31.

⁴⁰¹ Extraído de la *Exposición de Motivos* de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1992*. Consúltase el muy interesante trabajo de, LÓPEZ LÓPEZ, Mª Teresa y UTRILLA DE LA HOZ, Alfonso, “Una valoración de las políticas de gasto público en los Presupuestos Generales del Estado para 1993”, *Hacienda Pública Española*, nº 124, (1993), pp. 9-42.

⁴⁰² El ‘dogma’ de la competitividad impregnaría, en adelante, cada uno de los argumentos, presupuestos y justificaciones de los socialistas con expresiones como las que siguen a continuación: «La competitividad se convierte en un factor clave para el mantenimiento de un crecimiento sostenido». AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 33º Congreso del PSOE: Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo 1994, sig. Fc 1381, p. 12. ¿Cuál sería el camino para alcanzar la *nueva máxima*? Lo explicaba el propio documento unas páginas más adelante: «El reto que se plantea a la economía

lógica que está detrás del carácter desregulador de las reformas laborales aprobadas en 1992 y 1994, y de las traumáticas tres devaluaciones de la peseta entre septiembre de 1992 y mayo de 1993, de cara reactivar una demanda interna que se había contraído profundamente⁴⁰³. A pesar de los esfuerzos para llegar a cumplir las condiciones del Tratado de Maastricht, estas no se alcanzarán. España se irá incorporando a Europa en un pelotón trasero, el de la “segunda velocidad”⁴⁰⁴.

Concluimos. En todo caso, en estos duros años de reajuste, de convergencia, de competitividad, el *efecto arrastre* del 14-D de 1988, a partir del encadenamiento de la secuencia de movilización/conflicto/negociación, conllevará efectos considerables con respecto al gasto social, rompiéndose con las tradicionales políticas de moderación y contención. No obstante, y como en otros tantos casos, se ha de estar atento a la instrumentalización cuando no a la más que descarada manipulación que desde los medios socialistas, y desde buena parte de la academia liberal, se ha realizado con respecto a este *sensible* asunto. Una cuestión sobre la que se volverá más adelante, pero en donde ya resulta necesario aclarar algunos puntos de partida básicos. La razón: cifras e interpretaciones no cuadran tanto para la década en conjunto así como para los considerados años del pago de la “deuda social”. Por ejemplo, el economista Eduardo Bandrés destacaría como,

«los gastos sociales ascienden en sólo cuatro ejercicios presupuestarios del 20,8 por 100 de 1989 al 26,0 por 100 de 1993, con un crecimiento especialmente intenso en protección por desempleo y en sanidad, en donde el aumento presupuestario de cada ejercicio debe añadirse

española es el reto de la competitividad. El crecimiento y la creación de empleo exigen competitividad. La competitividad se obtiene mediante la inversión, la innovación tecnológica y la modernización empresarial, así como con la educación y la formación profesional de los trabajadores. A tal fin, es necesario un marco de relaciones laborales que haga posible la adaptación flexible de las empresas a las nuevas circunstancias, por un lado, y la adecuación de los trabajadores a las nuevas exigencias productivas [...]. Pero la competitividad exige que la evolución de los salarios se adapte a la de la productividad; en caso contrario es inevitable la destrucción de empleo y la deslocalización de las empresas europeas hacia países con bajos salarios». *Ibídem*, p. 21.

⁴⁰³ La justificación de estas devaluaciones –*no queridas pero necesarias*, según el discurso político socialista del momento– sería explicada por el Partido de la siguiente forma: «En los últimos meses, el restablecimiento de los niveles de competitividad anteriores a 1988 ocasionados por las devaluaciones de la peseta está propiciando una recuperación de los cuotas de mercado, tanto externo (mayores exportaciones), como interno (menores importaciones). Todo ello deberá traducirse en una mejora de los resultados de las empresas, que se irá intensificando conforme se recupere la demanda nacional, diagnóstico este que parece verse corroborado por la evolución de los mercados bursátiles en los últimos meses». Al mismo tiempo que se reconocía como el «recurso a devaluaciones sucesivas es poco convincente. Este es un procedimiento que no puede emplearse de forma recurrente y que exige para que resulte efectivo el que se planteen y resuelvan los problemas de fondo que están detrás de la pérdida de competitividad. En nuestro caso, las devaluaciones no han permitido recuperar la competitividad anterior, con ellas se nos devuelve algo que habíamos perdido, pero para que no resulten efímeras, habremos de corregir los problemas que generaron los desequilibrios que las motivaron». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria de gestión de los órganos federales [al] 33º Congreso del PSOE. Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo de 1994, sig. Fc 1378, pp. 26 y 28, respectivamente. Véase aquí el trabajo de, LINDE, Luis M^a, “La evolución de la peseta 1984-1994” en GARCÍA ATANCE, Salvador [et al.], *Historias de una...*, *op.cit.*, pp. 111-136.

⁴⁰⁴ Entre otros muchos estudios sobre el proceso de convergencia –junto con lo citado en las *nota 180* y otras– nos remitimos a las siguientes lecturas de *orientación liberal* en la mayor parte de los casos: ESTEBAN, Joan M y VIVES, Xavier (dirs.), *Crecimiento y Convergencia en España y en Europa*, II vols., Barcelona, Instituto de Análisis Económico / Fundación de Economía Analítica, 1994; ZABALZA, Antoni, “El camino hacia la Unión Económica y Monetaria: una perspectiva española”, *Documento de Trabajo. Dirección General de Planificación. Ministerio de Economía y Hacienda*, n° D-94002, (1994); o, VINALS, José, “¿Es posible la convergencia en España?: En busca del tiempo perdido”, *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, n° 9430, (1994).

después el importe de las operaciones de saneamiento por las que se reconocía la deuda contraída en años anteriores»⁴⁰⁵.

Pero ahora bien, si prestamos atención a la evaluación del también economista Juan Francisco Martín Seco la situación es radicalmente diferente:

«En todos estos años, para el conjunto de las Administraciones Públicas, si descontamos la partida de intereses [...], los gastos no financieros han sufrido un aumento de sólo 4 puntos porcentuales sobre el PIB (del 37,2% en 1982 al 41% en 1991).

Desde 1982 a 1991, el consumo público [...] ha incrementado su participación en el PIB solamente en un punto y medio [...].

Lo mismo cabe afirmar de las prestaciones sociales. Su participación en el PIB se mantuvo casi invariable desde 1982 a 1989, y sólo en los dos últimos años ha ganado un punto porcentual»⁴⁰⁶.

¿Dónde se origina tal abismo en la interpretación de los datos? Sencillo de considerar como aumento del gasto social el pago de la partida de los intereses. La contabilidad prácticamente lo aguanta todo, no así las interpretaciones, pues, este “pago” al que nos estamos refiriendo con ser importante de cara al saneamiento de las cuentas públicas, no puede, o mejor dicho no debería, computarse, en caso alguno, como un incremento del gasto público, pues se mezclan intencionadamente los activos con los pasivos financieros de las cuentas de la Contabilidad Nacional. Asimismo debe de tenerse presente la diferenciación entre el *gasto público* y el *gasto social*, tal y como planteó Jesús de Miguel. El mismo autor deja claro los límites del crecimiento en gasto social para todo este periodo partiendo del propio año 1992:

«En 1992 el gasto público se sitúa en torno al 42%, mientras que el gasto realmente social –de prestaciones llamadas sociales, en dinero o en especie/servicios– supone el 22%. La hipótesis es que el gasto social no crece proporcionalmente a la expansión del gasto general del sector público. En pesetas constantes el gasto social de las administraciones públicas en España se reduce del 65% en 1980 al 58% en 1992. El recorte se reparte entre todas las partidas esenciales. Las pensiones pasan del 26% del gasto público al 23%, es decir que bajan un 10%. Sanidad es lo que más disminuye (un 15% de recorte relativo) bajando del 14% al 12%. El recorte en educación es la mitad (el 7%) a pesar de que el número de niños/as disminuye bastante, pasando de representar el 10% del gasto público al 9%. El gasto en desempleo se mantiene constante [...] decreciendo sólo un 0,6%. En total el gasto social disminuye en pesetas constantes un 11% entre 1980 y 1992»⁴⁰⁷.

Aclarado esto, el *pago* de la “deuda social” tendría por principales protagonistas el incremento de las pensiones mínimas, incluyéndose las pensiones de viudedad o las pensiones no contributivas así como las políticas de protección del desempleo. Un pago de la *deuda social* que cifrado en torno a los 190.000 millones de pesetas, pero lejos de las demandas de las centrales sindicales, quienes calcularon el mismo en 450.000 millones de pesetas.

Terminaba, pues, la “década del cambio” con ciertos parecidos razonables a como había comenzado el trayecto modernizador como recientemente se ha advertido⁴⁰⁸. El efímero

⁴⁰⁵ BANDRÉS, Eduardo, “Gasto público y estructuras del bienestar: el sistema de protección social” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., p. 639. Del mismo autor, id., *Los efectos de los gastos sociales sobre la distribución de la renta en España*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1990. Compléntese lo aquí aportado con la *nota 179*.

⁴⁰⁶ MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Quiebra del modelo económico español” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, op.cit., pp. 148-149.

⁴⁰⁷ MIGUEL, Jesús M. de, *Estructura y cambio...*, op.cit. p. 301. Véase también el amplio estudio al respecto de, BAREA, José, GONZÁLEZ-PÁRAMO, José y VELARDE, Juan (eds.), *Pensiones y prestaciones por desempleo*, 2ª ed., Bilbao, Fundación BBV, 1997, desde un enfoque ‘liberalizador’.

⁴⁰⁸ El propio Carlos Rodríguez Braun titularía un trabajo al respecto de la siguiente forma: “De la agonía a la agonía”. En donde señalaría entre otras cuestiones no menores: «La economía durante el mandato socialista parece haber ido de la agonía a la agonía, aunque pasando, eso sí, por el éxtasis»; «La economía española padece en 1992 problemas similares a los de 1982, pero no ha vuelto a 1982. Y es que

incremento del gasto social pronto daría lugar a nuevas-viejas críticas sobre los efectos de la elevación de los salarios y un largo etcétera de sobra conocido. Las consabidas acusaciones desde la *crítica liberal* no tardaron en volver a aparecer⁴⁰⁹. El propio Miguel Boyer años más tarde explicaría, a través de lo que denominó los “tres efectos perturbadores”, el porqué del nodo explicativo de la crisis de los noventa. No casualmente el *efecto perturbador* del 14-D de 1988 aparecía en primer término. Tras las críticas a que se “abandonase la moderación en el gasto público” señalaba como “el descontrol afectó al Gobierno central, sino también a las Administraciones territoriales”. De este modo, “el gasto total de las Administraciones públicas, que había caído 1,5 puntos en términos del PIB entre 1985 a 1988, aumentó 8,1 puntos entre 1988 y 1993”⁴¹⁰. Un incremento del gasto que tenía a un gran protagonista: “el aumento de las prestaciones sociales en 3,8 puntos [...] y de la remuneración del personal al servicio de las administraciones en 2,4 puntos (sólo 0,2 entre 1982 y 1988)”. El segundo efecto perturbador también era conocido: la inversión pública, que se “mantuvo por encima del 4 por 100 del PIB en los años 1991-1992”, y que, a juicio de Boyer, dio paso al incremento del “déficit y al crecimiento de la deuda pública”⁴¹¹. Por último, el tercer efecto perturbador tenía que ver directamente con las políticas monetarias y fiscales que el propio ex-Ministro de Economía había impulsado en su etapa: la sobrevaloración de la peseta y su posterior devaluación, a lo que había que sumar las consecuencias que había acarreado la elevación de la presión fiscal en un sentido progresivo. Así pues, al,

«eliminarse el tipo máximo conjunto del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio, el tipo marginal pasó del 46 por 100 en 1987 al 56 por 100 y, por otra parte, no se corrigió el efecto de la inflación el nivel de renta a partir del cual se aplica el tipo máximo, que pasó –en pesetas actuales– de 25 millones en 1985 a 10 millones en 1994»⁴¹².

En todo caso, difícilmente se podía hablar para estos diez años de cualquier tipo de “tensión alcista de salarios” –aunque los propios socialistas no dejarán de citar tal hipótesis con

en economía, igual que en la vida, nunca se vuelve, siempre se va». RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “De la agonía a la agonía” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, op.cit., pp. 65 y 66, respectivamente.

⁴⁰⁹ Entre sus mayores exponentes, VELARDE FUERTES, Juan, *Los años en...*, op.cit.. En esta línea consúltese, GALÍ, Jordi [et al.], *La economía española...*, op.cit..

⁴¹⁰ Voces ‘autorizadas; no dudaron en definir simple y llanamente este incremento del sector público con el aumento de la burocracia. Véase, lo dicho por, FUENTES QUINTANA, Enrique, “La economía española desde la transición hasta el presente” en ANES, Gonzalo (ed.), *Historia económica de...*, op.cit., p. 748. En cualquier caso puede contrastarse opiniones y cifras en, INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, *Presupuestos de las Administraciones Públicas: evolución en el periodo 1986-1990*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991.

⁴¹¹ Por su parte Francisco Fernández Marugán remarcaría un aspecto que no puede ni debe pasar desapercibido. Nos referimos a la (teórica) lógica intrínseca que durante los gobiernos socialistas tendría la inversión pública, dentro de un discurso más propio de la lógica liberal que de una estrictamente socialdemócrata: «Sin este esfuerzo de inversión del sector público, el dinamismo del sector privado habría sufrido estrangulamientos severos [...]. En otras palabras, el crecimiento de la inversión pública no sólo no ha impedido el crecimiento de la inversión privada [...], sino que ha sido el complemento que ha aumentado su rentabilidad». FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 175.

⁴¹² BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, op.cit., pp. 95-97, respectivamente. Desde el lado académico véase su traslación en los mismos términos en, BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, op.cit., y concreto capítulo 7. “Las dimensiones política y electoral de la estrategia económica del PSOE” (pp. 203-212).

datos siempre más que cuestionables⁴¹³— pues la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores había sido la nota dominante⁴¹⁴.

En resumen, el *mantra* del déficit público, de la inflación y de la presión fiscal volvían a presentarse a finales de 1992 con la misma fuerza que a principios de los años ochenta, sin que en el transcurso de la década de los ochenta, tal y como se acaba de evidenciar con datos “oficiales”, hubieran sido corregidos en su perspectiva estructural. En gran medida se evidenciaban los *efectos perversos* de lo que desde instancias sindicales socialistas se denominaría el fracaso “modelo compulsivo de crecimiento”⁴¹⁵.

Para tales laborales el sustituto de Solchaga, tras salir de Economía un 11 de julio de 1993, Pedro Solbes, llegaba al Ministerio decidió a “corregir” sin vacilaciones políticas los equilibrios macroeconómicos. El instrumento adoptado: con otro paquete de nuevas políticas de ajuste que finiquitarían el breve como inconcluso periodo del *giro social*.

7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Una «obstáculo» en el *único camino posible* de la economía política socialista?

«De nuevo se ha verificado la conocida relación causa-efecto según la cual el empeoramiento de las condiciones materiales debilita la capacidad reivindicativa y remite la conflictividad laboral. Quizás la novedad de la situación española del fin de siglo reside en que el fenómeno se ha cumplido sin que el final del ciclo depresivo iniciado en los setenta y concluido a medios de los noventa, haya provocado formas de protesta alternativas a la huelga en un país en el que los estallidos sociales fueron la excepción y no la norma en el siglo que concluye, y, en menor medida aun, en las dos últimas décadas, en las que las economías domésticas han funcionado como amortiguador del masivo desempleo, el juvenil principalmente, según coinciden las encuestas y estudios al respecto».

David RUIZ, *Del «obrero consciente» al «currante posmoderno»*⁴¹⁶.

«Todo se paralizó completamente, en una huelga que la gente asumió como una huelga política sin excesivas dificultades. Es decir que en el 14-D se puso en cuestión, en la práctica, toda la política no sólo la política del gobierno socialista, sino la política de toda la mayoría parlamentaria. Parecía que en el 14-D se abría un proceso de ruptura. Sin embargo, unos meses después, en las primeras elecciones de junio y en las siguientes de octubre, el mapa político quedó prácticamente intacto».

⁴¹³ Consúltese los datos y los argumentos aportados por, ESPINA, Álvaro, “Diez años en la vida de España. Las políticas laborales y de empleo” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 461. Nos remitimos, una vez más, a los datos presentados en el apartado “8.2.1. La «obsesión enfermiza»”.

⁴¹⁴ MALO de MOLINA, José Luis, “Una visión macroeconómica de...”, *op.cit.*, p. 25.

⁴¹⁵ AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Sindical, “Claves para una orientación más eficiente de la política económica”, Madrid, 30 de noviembre de 1992, sig. 001833-001. Un informe donde se remarcaba un elemento clave para entender todo este proceso en una perspectiva a medio plazo: «Por otra parte, un exceso de rigidez en la concepción de la política macroeconómica ha contribuido de modo importante a perpetuar y agudizar algunas de las carencias [de la actual crisis]». *Ibíd.*, p. 28.

⁴¹⁶ RUIZ, David, “Del «obrero consciente» al «currante posmoderno». Las clases trabajadoras en el siglo XX” en MORALES MOYA, Antonio (coord.), *La modernización social*, Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 2001, p. 414.

Andrés BILBAO, *De la clase obrera a la sociedad de ciudadanos*⁴¹⁷.

«Hablar hoy de la huelga general del 14-D es relativamente fácil, a toro pasado. El motivo desencadenante de la huelga era un gran estupidez, como reconocen todos los líderes sindicales, también a toro pasado. En aquel momento la excusa era, para entendernos, la recuperación del contrato de aprendizaje. La verdad es que me sorprendió enormemente que ese asunto fuera el desencadenante de la huelga»

Felipe González, Presidente del Gobierno⁴¹⁸.

En esta historia de economía política de los ejecutivos socialistas en relación a su *papel* en la segunda fase de reestructuración del modelo capitalista español contemporáneo, se han de tener muy presente tres hechos históricos interrelacionados. Acontecimientos claves para interpretar el *antes*, el *durante* y el *después* de la “década del cambio”, pero también del devenir del movimiento obrero español contemporáneo.

Primero, vendría el proceso de *ruptura*, de tintes traumáticos, dentro de la familia socialista, segundo, la convocatoria y el éxito de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, y en tercer término, nos encontraríamos ante una breve etapa marcada por la negociaciones y la gestión de lo que se conocería como el “pago de la deuda social”.

Este último episodio citado forma parte de uno de otros tantos *lugares comunes* de los relatos mayoritarios de este tiempo. Examinar el mismo con detenimiento puede ser altamente relevante, de cara a comprender las propias dinámicas intrínsecas que acompañarían a la estrategia de la modernización socialista. Durante un corto periodo de tiempo, aquel denominado *giro social* cortocircuitaría parcialmente el siempre rumbo fijo de la política económica llevada a cabo. Otra cuestión, serían sus alcances así como las débiles voluntades políticas que se hallaban tras de él. Asimismo se trataría de un acontecimiento, en la práctica, único –cuando no excepcional– en toda la época socialista, en tanto desde el Ejecutivo se mostraría una mayor receptividad hacia las demandas sindicales y sociales. Receptividad, en todo caso, siempre sometida a los imperativos de la “única política posible”. En juego está, pues, releer y en su caso cuestionar las tesis, que han mantenido las narraciones *condescendientes* cuando no *amables*, que han defendido la existencia de un *giro socialdemócrata*⁴¹⁹.

De esta forma, lo que acontece en no poco más de dos años –entre 1987 a 1989, en lo básico, aunque aquí nos extenderemos hasta noviembre de 1990 por circunstancias que se explicarán– nos aportan numerosas como suficientes pistas para examinar con previsión la incrustación del “síndrome NHA” en la mayor parte de la dirigencia socialista⁴²⁰. Un *síndrome* que iría mucho más allá de las políticas desarrolladas, pues el mismo, obligadamente, se ha de vincular a la interiorización de una cultura política elitista y tecnocrática extendida entre políticos y técnicos socialistas. Acompañándose, en la mayor parte de las ocasiones, de toda una simbología y formas de representación social, que poco o nada tenía que ver con lo que había encarnado históricamente el socialismo español. Y como bien se sabe, las *formas* y los mismísimos *símbolos* constituyen una parte central de todo el *teatro de la política*.

⁴¹⁷ BILBAO, Andrés, “De la clase obrera a la sociedad de ciudadanos” en LACALLE, Daniel [et al.], *Trabajo y clase obrera hoy*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1991, p. 131.

⁴¹⁸ Felipe González en declaraciones a IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 858.

⁴¹⁹ Véanse la bibliografía, interpretaciones y datos manejadas al respecto en el apartado “2.2.11. La historiografía académica y profesional: una *agenda investigadora* prácticamente por inaugurar”, y en el apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

⁴²⁰ Consúltese lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 1*.

La capacidad de aguante, paciencia y tenacidad que había demostrado el *sindicato hermano*, la UGT, tanto con respecto al *partido hermano*, el PSOE, como con respecto al mismo Gobierno, estaban fuera de toda duda, tras más de cinco años de dar comienzo la época socialista. Pero como sucede en toda “buena” familia como en la política todo tiene sus límites, y una vez superados estos, la *ruptura* y el *trauma*, generados por las incomprensiones, los engaños, los recelos y finalmente el divorcio, generan *heridas* que tiempo tardan en cicatrizar⁴²¹.

Desde una perspectiva sindical, la historia de las relaciones de la central ugetista con los diferentes actores de la familia socialista, nunca resultarían sencillas. Incluso, nos atreveríamos a señalar que las mismas siempre estaría guiada por suspicacias y sospechas –en su mayor parte fundadas en evidencias y pruebas consistentes– cuando no directamente en temores. Así, sin irnos muy lejos –desde los primeros años ochenta– se podrían citar no pocos elementos de lo que no dejaría de ser un continuada falta de confianza: desde las dudas que suscitaba la cada vez más mayoritaria presencia del *ala liberal* económica del PSOE –como se mostró a la salida de su XXIX Congreso en 1981⁴²²– pasando por la captación de cuadros sindicales para tareas políticas⁴²³, hasta otros detalles menores tanto o más trascendentales como pudieron ser las mismas relaciones personales entre los principales dirigentes Partido-Sindicato. *Prevenciones*, que no harían más que incrementarse tras la victoria socialista de octubre de 1982, cuando comenzarían a sonar con nombres y apellidos la candidatura del miembro de la CEC de UGT, José Luis Corcuera, como ministrable de Trabajo⁴²⁴.

Realmente, hubo poco tiempo para saborear la victoria socialista así como la constitución del ejecutivo presidido por Felipe González. En el primer Consejo de Ministros, a *trancas y barrancas*, saldría adelante el compromiso electoral de elaborar y enviar a las Cortes un proyecto para la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas⁴²⁵. Con muchos más recelos de lo que pudieran pensarse, en un primer momento, se legislaría en tal dirección. No obstante, poco tiempo después se patentizaría las preocupaciones y también los temores del propio Gobierno en no fomentar los ánimos levantiscos por parte de la CEOE, al dictarse una instrucción ministerial de Trabajo que retrasaría para 1984 su entrada en vigor⁴²⁶. También por las mismas fechas, las salidas de tono del propio Presidente del Gobierno –cuando como, por ejemplo, afirmaría un 26 de abril de 1984 que “el sistema capitalista es el menos malo, es el que

⁴²¹ Aunque cuestionable el marco teórico presentado, la tesis doctoral de Javier Astudillo –*Los recursos del socialismo*– constituye a día de hoy –inclusive a pesar de los años transcurridos desde su lectura– el mejor estudio sobre las relaciones entre el PSOE y la UGT. ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, *op.cit.*, en concreto véase el “Capítulo V. Paradojas del enfrentamiento entre el PSOE y la UGT” (pp. 261-366).

⁴²² Consúltense, de nuevo, las tesis mantenidas en, AHFPI, PSOE, “Anexo del acta del 29º Congreso. Política socio-económica. Sindicalismo y cooperativismo”, Madrid, 1981. Y sobre aquellos momentos nos remitimos al apartado “4.2.2.3. La moderación programada (1979-1981)”.

⁴²³ Véase, Capítulo 4, *nota* 372.

⁴²⁴ Consúltense lo ya mencionado en el apartado “5.1. Las *idas y venidas* en el Consejo de Ministros: breve y ajustado relato de la composición de los gobiernos socialistas en la «década del cambio»”.

⁴²⁵ Nos referimos a las siguientes normativas: Ley 4/1983, de 29 de junio, *de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones mínimas en treinta días* [B.O.E. 30 de junio de 1983]; Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, *sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos* [B.O.E. 29 de julio de 1983].

⁴²⁶ Instrucciones de la Dirección General de Trabajo, de 22 de julio de 1983, *para el visado de calendario, en cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley 4/1983*. Sobre todas estas cuestiones se volverá a hablar extensamente en el apartado “10.2.1. El momento de la toma de decisión política: la irrevocable necesidad de flexibilizar (marzo/mayo 1983-agosto 1983)”.

mejor funciona”⁴²⁷ – pasando por las permanentes llamadas a la ortodoxia económica liberal por parte de Boyer, o inclusive cuando Solchaga anunciaría la imposibilidad de cumplir la promesa electoral de la creación de los 800.000 puestos de trabajo con su característica *sensibilidad social y sindical*, irían minando lentamente la capacidad de aguante de la central ugetista⁴²⁸.

Si por el lado de las *declaraciones* se mantendría, en la mayor parte de los casos un prudente *silencio* político-sindical, en el campo de las actuaciones la UGT demostraría una capacidad sin igual de resignación ugetista. Una posición que la obligaría, a la vez, a un sucesivo reacomodamiento de toda su estrategia sindical y política en un tiempo record. El caso de las dramáticas negociaciones que acompañarían a la reforma del Estatuto de los Trabajadores y al futuro Acuerdo Económico y Social, siempre bajo la amenaza que desde el Gobierno se legislará en solitario o directamente se pactara con la CEOE los puntos centrales del mismo, constituiría no sólo uno de los mejores ejemplos, sino todo un exponente de *templanza* pero sobre todo -insistimos- de *resignación* a la hora de mantener, al precio que fuera, la *unidad* de la familia socialista⁴²⁹. O también cabría citar, sin salirnos de los marcos temporales de la primera legislatura, la difícil posición mantenida en relación a la propia negociación y tramitación parlamentaria de la conocida como Ley de Pensiones y su posicionamiento frente a la huelga general de 1985⁴³⁰.

Pero aquella estrategia no estaba exenta de graves peligros. Primero, el riesgo de aislarse en un panorama conflictivo a nivel sindical, en donde la UGT no sólo es que apareciera en no pocos casos como mera “correa de transmisión” del Ejecutivo; sino es que a lo anterior se sumaba los permanentes ataques y conspiraciones contra Comisiones Obreras –en la práctica transformada en el principal sujeto opositor del socialismo durante la primera legislatura– en un estrategia que dinamitaría cualquier posibilidad de “unidad de acción”. El habitual empleo de la existencia de una abierta y enconada “guerra sindical” por parte de los medios de comunicación, no constituía ningún tipo de exageración. Ello en un coyuntura que marcada por la crisis pero muy especialmente por la reconversión industrial, llevaría también a la UGT a actuar como un agente político-sindical desmovilizador –o como ha explicado Rubén Vega “elemento moderador de la contestación social”⁴³¹– de cara a garantizar que la estrategia de la modernización no se viniera abajo en tiempos frágiles de legitimidad político-institucional⁴³².

En los despachos de la central ugetista en la calle San Bernardo nº 20, en pleno centro de Madrid, en la calle Ferraz nº 70 y no muy lejos de allí en el complejo de La Moncloa – pasando por otros lugares públicos o privados, según la cuestión a negociar– los hábiles negociadores de la UGT, tras todo tipo de componendas, lograrían mantener la *unidad* de la familia socialista. ¡Qué difíciles y duros momentos! Astudillo llegaría a hablar de “amargos dilemas”⁴³³. *Bautizados* a la fuerza en necesarios creyentes en que la política económica

⁴²⁷ Véase el preciso contexto histórico en donde se producirían tales declaraciones en el apartado: “12.1. De vuelta a los *despachos*: el largo preámbulo de la reconstrucción del *fallido* diálogo social (febrero-julio 1984)”.

⁴²⁸ Véase lo apuntado en la *nota 114* y en la *nota 115*.

⁴²⁹ Nos remitimos al Capítulo “12. La «necesidad hecha virtud»: el difícil parto del Acuerdo Económico y Social (febrero-diciembre 1984)”.

⁴³⁰ De nuevo, nos remitimos a lo apuntado en la *nota 41*.

⁴³¹ VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, *op.cit.*, p. 183. Todavía queda más clara esta cuestión con la ‘concepción instrumental’ que el propio Alfonso Guerra reconocería que se daban a las actuaciones de UGT: «La actitud del sindicato era un elemento decisivo para otorgar crédito a las críticas y acusaciones que desde otros ámbitos se hacían del Gobierno y para legitimar los conflictos sociales». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, *op.cit.*, p. 291.

⁴³² Nos remitimos aquí al apartado “8.4. Un posible balance en torno a la época socialista alejado de los *lugares comunes*”.

⁴³³ ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, *op.cit.*, p. 545. En aquellas circunstancias mucho pesaría lo siguiente: «En última instancia, toda esta serie de intercambios se podía resumir en uno más

socialista era la “única política posible”: igualmente asumirían la otra también *tesis socialista* de que su política tenía un *carácter instrumental*. A saber, tras la salida de la crisis económica vendría la hora del reparto⁴³⁴.

Eso sí, tras tantos sacrificios y complicados trances políticos, la UGT, empero, vería recompensada su labor, tras no pocas negociaciones y reuniones secretas y/o confidenciales, con toda una serie de recompensas para nada despreciables. *Jugosas recompensas* que con el paso del tiempo perderían su atractivo inicial, una vez consolidada y fortalecida la organización ugetista⁴³⁵. Desde la redacción a su medida de la futura LOLS⁴³⁶, a la devolución del Patrimonio Sindical Histórico y del Patrimonio Sindical Acumulado casi a ritmo de acuerdo social firmado, a otro tipo de *favores políticos* menos perceptibles pero con no poca trascendencia, se podían localizar en la *trastienda* de todas las negociaciones. Ahí estarían, por ejemplo, el retraso de las elecciones sindicales de 1984 a dos años después, o ciertas ayudas económicas y políticas en los propios procesos electorales sindicales⁴³⁷.

En cualquier caso, no estaría completo este cuadro inicial si no se remarcará una hipótesis que ha sido manejada por más de un autor. Mantienen estos, que gracias a la doble estrategia de influencia pero también de oposición a las posiciones reformistas más radicales dentro del Ejecutivo socialista, se conseguiría frenar los aspectos más liberales de no pocos proyectos. En concreto, se suelen citar como ejemplos tanto la reconversión industrial como el desarrollo legislativo de la contratación temporal tras la aprobación del AES. Asimismo, estos mismos autores –encabezados, en lo básico, por Emma Cerviño– han defendido como esta doble posición *nunca rupturista* de la UGT, iría mucho más allá de los propios intereses políticos de la central socialista, permitiendo extender las parciales conquistas obtenidas –o, por el contrario, frenando importantes retrocesos sociales o sindicales– dentro de la clase trabajadora. Una lectura cuanto menos sorprendente, en tanto se llega a tratar a los sindicatos como meras organizaciones corporativistas y/o clientelistas, desconociendo, a su vez, la

general donde el sindicato alcanzaría sus variados objetivos no sólo apoyando al partido a ganar las elecciones, sino ayudando desde la negociación colectiva en las tareas de gobierno; y el partido ganaría las elecciones al tener éxito las políticas que satisfacerían a los sindicatos». *Ibídem*, p. 552.

⁴³⁴ «En el caso de la UGT, los datos sugieren que, mientras su dirección confió en que las políticas económicas tendrían éxito, no las puso globalmente en cuestión, simplemente se limitó a cuestionar aquellos aspectos que estimaba que perjudicaban la conservación de la organización o que le impedían alcanzar tal y como ellos entendían sus objetivos ideológicos». *Ibídem*, p. 504. Véase aquí también, ESCUDERO, Manuel, “Objetivos futuros para una política económica progresista” en *Estado de bienestar y opciones de política económica*. Dossier monográfico, *Sistema*, nº 80-81, (1987), pp. 111-120; y dentro de ese mismo número, RODRÍGUEZ, Julio, “Un comentario sobre la crisis del pensamiento económico de la izquierda” (pp. 91-100).

⁴³⁵ Las conclusiones finales de la larga tesis doctoral de Astudillo son lo suficiente aclaratorias para detenernos en las mismas: «En resumen, en la UGT y en el PSOE empezaron a evaluar que nos les compensaban mantener las relaciones de solidaridad con su antigua organización hermana, no tanto porque hubieran *estimado* que habían dejado de obtener los bienes esperados de sus relaciones (incremento del empleo, gasto social o votos) a causa de cambios macroestructurales, sino porque tales relaciones entrañaban un coste organizativo inasumible dadas las estructuras de oportunidades y los dilemas en los que se encontraban. Esto llevó a su vez a que el Partido socialista no proporcionase los bienes que le requería su sindicato, por lo que éste buscó otros medios de conseguirlo, y no le apoyo en las siguientes elecciones celebradas en España, poniéndose así en evidencia que este último hecho no era tan grave. El resultado final fue que, ahora sí, las direcciones de ambas organizaciones (primero la ugetista, después la del PSOE) evaluaron que obtenían poco de unas relaciones que entrañaban importantes restricciones estratégicas». ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, *op.cit.*, pp. 612-613.

⁴³⁶ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de *Libertad Sindical* [B.O.E. 8 de agosto de 1985].

⁴³⁷ Véase lo apuntado en la *nota 132*.

trayectoria histórica contemporánea del movimiento obrero en España, aun tratándose de la UGT⁴³⁸.

Avanzamos. El final de la primera legislatura no sería para nada sencillo. Sin perspectivas a corto plazo de salida a la crisis, y tras casi tres años consecutivos de una política de sacrificios económicos y salariales –eso sí, siempre acompañada dicha política del *adjetivo* de “solidaria”– que no tenía parangón desde el final de la dictadura, una pequeña piedra se sumaría en ese accidentado camino de la convivencia familiar. La postura dentro del Partido frente a la OTAN contribuiría, a su manera, a incrementar las cada vez más palpables distancias. Y no eran pocos los espacios de enfrentamiento cuando no de abierto conflicto.

La *bronca* que tendrá lugar en el Comité Federal del PSOE el 21 de diciembre de 1985 entre los dirigentes de Izquierda Socialista, alineados con la UGT y la plana mayor del socialismo español, sería histórica con el resultado de todos conocidos⁴³⁹. No mucho tiempo después se realizaría el balance interno oportuno, en donde no faltarían ninguno de los consabidos argumentos: desde la conspiración anti-socialista al éxito de la decisión adoptada⁴⁴⁰.

Más allá de lo que se escribía o se publicitaba de puertas para afuera, el balance de la primera legislatura socialista para la propia UGT, sin duda, había frustrado no pocas perspectivas de su proyecto histórico –al menos a corto plazo– a la par que había evidenciado una tenacidad –y también un *compañerismo* no cuestionables– resistente a las más duras pruebas. Pero a la vuelta de las elecciones generales del 22 de junio de 1986, la *paciencia histórica* demostrada comenzaría a tocar a su fin.

En paralelo a la *salida a la crisis económica*, tras tantos años de *medidas duras muy duras* y de tantos y tantos sacrificios, en lo básico, por parte de los trabajadores y las clases populares, las diferencias y discrepancias entre Partido-Sindicato serían cada vez más notorias

⁴³⁸ Esta tesis ha sido defendida en más de un caso, en concreto, de cara al desarrollo legislativo de la RET’84 a partir de la firma del AES por, CERVIÑO, Emma, *Políticas de representación...*, *op.cit.*.

⁴³⁹ En primer lugar nos remitimos a, AHFPI, PSOE-CF, “Resumen del acta del Comité Federal de 21 de diciembre”, Madrid, 1985, sig. FC 3919. En cuanto su repercusión en la prensa –en donde se evitarían ofrecer los detalles morbosos–: Noticia, “La dirección del PSOE aprobó el documento OTAN con la oposición de los «críticos»”, *ABC*, 22 de diciembre de 1985; Noticia, Fernando Jáuregui, “Luz verde a la campaña por la permanencia en la OTAN tras aprobar el PSOE el documento «Sobre paz y seguridad»”, *El País*, 22 de diciembre de 1985; Noticia, Anabel Díez, “Izquierda Socialista considera «zanjado» el debate sobre la Alianza Atlántica”, *El País*, 23 de diciembre de 1985. En tercer lugar, consúltese el citado documento socialista en, PSOE, “Una política de paz y seguridad para España”, *El Socialista*, n° 395, (1985), pp. 7-10. En el siguiente número del periódico partidista publicado tras la reunión de la CEF se abriría de la siguiente forma: Portada, “El PSOE reafirma la voluntad de celebrar el referéndum”, *El Socialista*, n° 396, (1986), p. 1. Número donde también se incluía el texto íntegro de la resolución del Comité Federal: “La opción que más interesa a España es la permanencia en la Alianza Atlántica”, y que titulaba: «Frente a incrédulos, negacionistas y abstencionistas, el Comité Federal PSOE ratificó la convocatoria del referéndum». Por último, véase aquí un posible relato crítico al respecto de lo que aconteció antes y después del 21 de diciembre, en, SANTESMASES, Antonio, “La permanencia de España en la OTAN y el final de la transición política” en *Repensar la izquierda...*, *op.cit.*. Asimismo léase la otra cara del conflicto en, RUPÉREZ, Javier, *España en la OTAN: relato parcial*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

⁴⁴⁰ «El referéndum, sin duda, requirió un considerable esfuerzo de responsabilidad, de inteligencia y de madurez por parte de los ciudadanos. Sin duda también, ese esfuerzo y la propia resolución de un tema tan difícil creó tensiones y desgarramientos. El objetivo de la oposición fue desgastar al Gobierno y al PSOE; el oportunismo y la irresponsabilidad máximas se manifestaron en partidos que ni siquiera se pronunciaron en ningún momento sobre su propia posición. El Gobierno y el Partido cumplieron con su obligación, tanto al convocar el referéndum como al proponer, más allá de intereses partidistas, la mejor propuesta desde el punto de vista de los intereses generales. Las dificultades, sin duda, fueron muy grandes; los costes también fueron relevantes». AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 31 Congreso del PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid 2 y 3 de octubre]”, Madrid, enero del 1988, Fc 652, p. 16.

como públicas. En parte, porque cada vez quedaba más claro que el proyecto de la estrategia de la modernización socialista poco o nada tenía que ver con políticas socialdemócratas o socialistas, que con fundada ilusión los dirigentes ugetistas habían apoyado, frente a su militancia y el movimiento sindical en tiempos de zozobras e incertidumbres. Quizás lo que quedaba por resolver en aquel entonces, era si el Ejecutivo como el Partido seguían necesitando como necesario colaborador a un agente dentro del mundo del trabajo o no. O, por el contrario, se había convertido éste en un *lastre* en el campo ideológico y estratégico ante sus permanentes reivindicaciones sociales y las cada vez más abierta críticas al carácter liberal y más tarde neoliberal del Gobierno socialista, junto con otras tantas denuncias⁴⁴¹.

No eran interrogantes menores, pues junto a la cada vez más evidente necesidad de diferenciarse en lo político y en lo estratégico de las políticas socialistas y de ciertos comportamientos públicos, recuperar su autonomía sindical volvería a la primera línea de la agenda política ugetista. Autonomía sindical a la que UGT había renunciado *de facto* en los años anteriores. Ello sumado a dos riesgos no descartables ante su seguidismo partidista: la pérdida de su base militante así como la abierta posibilidad de desatar fricciones y grietas a nivel interno.

Si en su momento la forma en que transcurrió tanto la negociación como la definición de los contenidos del AES, levantarían, por vez primera vez, en muchos años críticas dentro de la UGT –que por más que se quisieran tapar terminarían saliendo a la luz pública a los pocos días–; el final de su vigencia para fines de 1986 y las nulas perspectivas de lograr un nuevo acuerdo social por parte del Gobierno –a quien resuelto el tramo más complicado de su proyecto modernizador, otro posible acuerdo de estas características no figuraba entonces entre sus prioridades estratégicas– ayudaría a clarificar el camino a adoptar. Y aquí se ha de tener muy presente, por un lado la *dialéctica socialista*, y, por otro, la falta de voluntad política real de alcanzar los mismos. Si bien, no se dejaría de insistir en la necesidad de abordar nuevos acuerdos sociales, estos, en la práctica, no podrían llevarse a efecto ante las rotundas negativas de cuestionar la política económica desarrollada. No faltarían, de hecho, los ejemplos en los siguientes dos años.

Superados los duros e importantes retos políticos del año ochenta y seis –desde el referéndum de la OTAN, pasando por las elecciones generales de 1986 o la propia entrada en la CEE– las contradicciones se volverían insoportables. *Retos* que pese a haberse superado, dejaban también claro los costes de ser co-partícipe de la citada estrategia gubernamental. Más allá de los 18 escaños obtenidos menos y del millón y pico de votantes que perdería el PSOE en las elecciones del 22 de junio de 1986; las aplazadas elecciones sindicales de 1986/1987, a pesar de ganarlas UGT con más de cuatro puntos que en 1982 –de 36,7% a 40,9%⁴⁴²– con todas las colaboraciones posibles e imaginables por parte empresarial y de no pocos poderes públicos –incluida la colaboración del “señor del maletín” visitando polígonos industriales y pequeños centros de trabajo–; resultaría que las mismas para “Nicolás [Redondo] fue una derrota [ante el triunfo de CCOO en las medianas y grandes empresas] y provocó un cambio de estrategia que le enfrentó con el Gobierno socialista”⁴⁴³. Un proceso electoral del que también se extraería otra

⁴⁴¹ Vuelva a revisarse lo dicho en el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”.

⁴⁴² Los datos completos fueron los siguientes: Total de Delegados: 69.427 / 59.230 UGT y CCOO, respectivamente: 39,6% / 33,8% UGT y CCOO, respectivamente. Cifras procedentes de, VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, a partir de los datos proporcionados por el Ministerio de Administraciones Públicas en 1987. Véase también en el *anexo estadístico* el *Gráfico 32* y la *Tabla 161*.

⁴⁴³ GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, *op.cit.*, p. 287. Además de aplazarse las elecciones sindicales a petición expresa de UGT, en una interpretación de la normativa por parte de los responsables del Ministerio de Trabajo de dudosa legalidad [véase el Capítulo “10. Historia e intrahistoria de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 (marzo/mayo 1983-febrero 1984)”, la publicación de los resultados definitivos de aquellas elecciones darían lugar a no pocos duros enfrentamientos –sumadas a decenas de denuncia de fraude y compra de votos– en la propia sede de la Comisión Nacional de

conclusión: ni la mejor de las condiciones *objetivas* como *subjetivas* la UGT tenía a su alcance la conquista de la hegemonía sindical.

Por más que llegaría lo que se conocerían los “años dorados” de los gobiernos socialistas –una expresión imbuida de un claro acento *liberal*⁴⁴⁴– ni el desempleo disminuía ostensiblemente a pesar de la fuerte creación de empleo neto, ni, por otro lado, se frenaría la precarización progresiva y constante del mercado laboral. Dichos en otras palabras, se mirara por donde se mirara no se podían observar los *beneficios*, a nivel social y sindical, de que en el Gobierno estuvieran quienes se proclamaban los representantes del socialismo español.

La *hora del reparto* ni estaba ni se la esperaba como se encargarían de evidenciar el diseño y los contenidos de los PGE para 1986 y 1987. El *queme* político y la *desconfianza* personal estaban conduciendo a la siempre maltrecha convivencia dentro de la familia socialista, a una situación límite. Pero más allá de datos y de decisiones políticas, los *gestos* dentro de unas cada vez más maltrechas relaciones ayudarían a cimentar la crisis definitiva.

El 2 de febrero de 1987 en los platos de TVE en Prado del Rey (Madrid) estaba previsto un debate entre Carlos Solchaga, José María Cuevas, Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, que dirigiría Victoria Prego. Como una vez más ha traído a colación Mariano Guindal, la *otra correa de transmisión* entre el Ejecutivo y la CEOE seguía funcionando, al menos, en sus aspectos formales. Narra el veterano periodista económico como en la,

«habitual copa de bienvenida que se organiza antes de los programas, el ‘patrón de patronos’ hizo un aparte con Solchaga:

- No sé como lo verás tú, pero me parece que lo más lógico sería que yo fuese más duro con Nicolás y con Camacho y tu juegas el papel más moderador.
- El debate lo llevará el ministro de Economía, que es a quien corresponde.
- Bueno, yo sólo quiero que sepas que estoy dispuesto a asumir la pelea en lo que me toque.
- ¡Ni hablar! Éste se va a enterar».

Aquel jueves primaveral decenas de miles de ciudadanos asistirían a uno de los espectáculos televisados más bochornosos que se han podido ver a lo largo de la historia de TVE. Y no han sido pocos. *Bochornoso*, a la par que clarificador de las muy debilitadas relaciones Gobierno y Sindicato, y claro está, a nivel personal entre Solchaga y Redondo. Allí un hastiado Secretario General de UGT saldría a la ofensiva contra el Ministro de Economía, siempre obsesionado por los *designios* de la racionalidad económica. El Secretario General de la UGT soltaría unas cuantas frases que serían recordadas para la posteridad: “Tu problema, Carlos, son los trabajadores”; “Me cuesta mucho establecer diferencias entre tú como ministro y Cuevas como presidente de la patronal. Te has equivocado de trinchera”; “Carlos, tienes menos sensibilidad social que una almeja”⁴⁴⁵.

De ahí a lo que pasaría no más de diez meses más tarde, la dirección ejecutiva de la UGT se iría armando de más argumentos –tanto políticos pero también psicológicos– para dar el *paso definitivo*. Argumentos que no razones, en tanto estas últimas abundaban a raudales. Por ejemplo: la obstinación del propio Ministro de Economía de mantener a *rajatabla* el objetivo de la inflación del 5% para 1987 cuando ni siquiera la patronal pensaba que se ajustaba a la propia realidad, reforzarían la cada vez más segura decisión.

El PSOE que entonces ni después se movería en lo político y lo estratégico de la política gubernamental –fuera cual fuera esta– a principios de 1987, a poco menos de un año para la celebración de su 31º Congreso, seguía actuando como una *simple correa de transmisión*

Elecciones Sindicales. Véase, Noticia, “La central UGT, proclamada mayoritaria en las elecciones sindicales”, *El País*, 2 de junio de 1987.

⁴⁴⁴ Véase lo apuntado en la *nota 229*.

⁴⁴⁵ GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, *op.cit.*, p. 287.

perfectamente engrasada con el Gobierno⁴⁴⁶. Concluida la vigencia temporal del AES, con valoraciones nunca positivas cuando no directamente negativas para la mayor parte de los firmantes implicados⁴⁴⁷, la CEF del PSOE saldría a explicar a sus cuadros y militancia las causas –a la par que a señalar a los *culpables*– de que no hubiera sido posible alcanzar un acuerdo social o cuando menos un acuerdo interconfederal como un mal menor. “Este hecho ha sido valorado como negativo por la dirección del Partido, a través de este documento, desea informar a la organización de sus puntos de vista”, se remarcaba en una larga *circular*, que más bien parecía un informe macroeconómico, eso sí, con las anotaciones políticas pertinentes⁴⁴⁸.

Se avisaba allí de un “potencial aumento de la conflictividad”, pero sobre todo de los “riesgos de la negociación colectiva para aquellos trabajadores que disponen de menor capacidad de presión organizada”. Alegato añadido a favor de las consabidas bondades de todo acuerdo social, su no existencia llevaría a “introducir un elemento de incertidumbre en la marcha de la economía”. Una situación económica a la que todavía se calificaba como de *débil*, por más que los datos macroeconómicos apuntarían tendencias positivas. Una toma de posición situación, al parecer, que no planteaba problema o contradicción alguna, con la otra “actitud pública” mantenida por no pocos dirigentes socialistas de hablar sí y día también, de los éxitos de la marcha en el terreno político-económico. La *esencia* de la dialéctica socialista encontraba su cenit en estos pequeños detalles de lo cotidiano.

Así pues, para la organización socialista lo que no tenía sentido alguno es que se hubiera llegado a tal situación. De hecho, la misma suponía un evidente “retroceso en la estrategia general de concertación social, estrategia diseñada por la UGT y apoyada por el Partido”. El enemigo –todavía entonces calificado de mera *oposición*– comenzaba a visualizarse. Al mismo tiempo, aparecían por todos los frentes “operaciones de descrédito destinadas a provocar un deterioro del Gobierno socialista”. Operaciones que se extendían contra el conjunto del proyecto socialista y que como se recordaba, oportunamente, tenía un *fin instrumental* dirigido al “interés general y basad[o] en la idea de la solidaridad”.

En aquella *circular-informe* se presentaría, asimismo, una especie de correlato *seudo-oficial* de los hechos, que girarían, esencialmente, en torno a la no cuestionabilidad de la inflación prevista y la correspondiente banda salarial a aplicar. Datos aparte manejados que contenían no pocos *vacíos* y *omisiones*, allí se mantenían todas las consignas que se venían escuchando desde hacía un lustro: “hay que señalar que la insistencia del Gobierno socialista en el objetivo no es un empeño gratuito”, a saber se trata de un análisis económico riguroso; por su parte el Ejecutivo había marcado una “banda salarial que permite un aumento de capacidad

⁴⁴⁶ Todo ello que por más que se negara la mayor por escrito: «En estos tres años hemos recibido muchas veces el eco de la falsa polémica sobre la hegemonía del Partido sobre el Gobierno o viceversa. Nuestro punto de vista ha sido radicalmente distinto: hemos trabajado con el concepto de que ni el Gobierno es el Partido ni el Partido es del Gobierno, por la sencilla razón de que son realidades antitéticas, sino que están en una perfecta simbiosis al servicio de un mismo proyecto socialista, que, en definitiva, no es patrimonio ni del Gobierno ni de la dirección del Partido, sino del conjunto de millones de españolas y españoles que nos dan la confianza en las urnas para que llevemos a buen puerto el proyecto de una sociedad que hemos ofrecido en los programas electorales». AHFPI, PSOE-CE, “31º Congreso del PSOE. Informe Político. Memoria de Gestión, 1984-1987”, Madrid, enero de 1988, sig. C 659, t1, p. 23.

⁴⁴⁷ Véase la *nota* 427.

⁴⁴⁸ Véase la interpretación dada por Alberto Oliet Palá acerca de las causas que harían fracasar aquella negociación, y en donde la experiencia previa adquirida se convertiría en un elemento clave: «Los intentos de la Presidencia del Gobierno para iniciar la negociación tripartita en aquél mes de julio fracasaron ante unos sindicatos acantonados en su oposición al método de negociación [...]. Un pacto de aquellas características [tripartito y de duración de tres años] presupone un acuerdo de base sobre política económica y, en definitiva, la asunción de la propuesta por el Gobierno. Lo cierto es que el Gobierno siempre insistió en que la realización de un diagnóstico común sobre la situación macroeconómica era un requisito imprescindible del pacto social». OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social en..., op.cit.*, p. 243.

adquisitiva”, por más que se tuviera que especificar que “en todos los años de Gobierno socialista los trabajadores han visto aumentar moderadamente la capacidad adquisitiva de sus salarios con la excepción de 1984”. Posición, en cualquier caso, debatible⁴⁴⁹.

Tras calificar a su política de “Solidaria, Progresista y Equilibrada”, resultaba que las propuestas sindicales en relación a las subidas salariales “ponen en peligro los objetivos de política económica”. Remarcando, finalmente, como la legitimidad del Gobierno estaba en las urnas y no en la calle, se dejaba escrito *blanco* sobre *negro* un mensaje no exento de victimismo y donde se defendería a ultranza la política y las decisiones adoptadas:

«Esta política se puede criticar globalmente, y de hecho se hace, por quienes no comparten este proyecto político y trabajan para deteriorar y debilitar al PSOE y al Gobierno. También se lanzan ataques globales desde algunas organizaciones que no tuvieron inconvenientes en firmar acuerdos con gobiernos anteriores y nunca lo han hecho, ni siquiera lo han intentado, con el Gobierno del Partido Socialista; y que se lanzan a preparar convocatorias de movilizaciones o de huelgas generales cuando no siquiera ha comenzado la negociación de los convenios»⁴⁵⁰.

Dicho cierre en *banda* nada bueno auguraba. Más aún teniendo presente los palpables signos de auge económico.

En julio de 1987, en otra circular de la CEF del PSOE, y superado los meses más complicados en relación a la negociación colectiva, argumentos, datos, opiniones y consignas se volvían a presentar con el mismo formato y contenido a su clientela política. Una de las pocas novedades que allí se podían observar era la constatación de la salida definitiva de la crisis, aunque la misma se hubiera producido a un “ritmo más lento que el inicialmente el previsto”⁴⁵¹.

Sin perspectivas de recuperar por ningún lado el *dialogo social* –tras toda una serie de movimientos internos que fracasaran, en buena medida, por la negativa de Solchaga de aceptar una subida salarial del 5,5% de las pensiones así como de los sueldos de los funcionarios– la obstinación tanto del Partido como del Gobierno en mantener, inclusive en tiempos de crecimiento económico, una política de austeridad y de racaneo en materia social, se concretaría en el proyecto de PGE de 1988.

Si la *bronca* política que tendría lugar en el CF del PSOE el sábado 21 de diciembre de 1985 en relación al referéndum de la OTAN sería mayúscula, lo que sucedería dos años después, un viernes 2 de octubre de 1987, superaría con creces aquel espectáculo⁴⁵². Un espectáculo que la prensa suavizó en su momento –como era ya una inveterada costumbre– y fuera de lecturas que tienen a leerlo todo en clave personalistas, supondría el culmen a muchos desencuentros e incomprensiones mutuas⁴⁵³.

El informe que presentaría la CEF del PSOE al Comité Federal volvía a ser una cerrada defensa de lo andado y por andar y de lo conseguido y por conseguir, sin la menor –no digamos

⁴⁴⁹ Nos remitimos a los datos apuntados en el apartado “8.2.1. La «obsesión enfermiza»”.

⁴⁵⁰ AHFFLC, PSOE-CEF, “Circular n° 23”, Madrid, 1987, sig. 002906-005, p. 1, 2, 5, 8 y 10, respectivamente.

⁴⁵¹ AHFFLC, PSOE-CEF, “Circular n° 27”, Madrid, 15 de julio de 1987, sig. AI 469-02.

⁴⁵² AHFPI, PSOE-CEF, “Informe de gestión al Comité Federal. Informe Político”, Madrid, 2 de octubre de 1987, sig. Fc 4009. Vol. I, p. s/p.

⁴⁵³ Entre otros reportes véanse, primero, el del *El País* quien prácticamente reproducía las tesis del bloque dominante dentro del PSOE: Noticia, Juan González Ibáñez, “Felipe González advierte a UGT que las discrepancias con el PSOE pueden hacer perder a éste la mayoría”, *El País*, 3 de octubre de 1987; Noticia, Juan González Ibáñez, “Felipe González pide a los socialistas que se esfuercen en definir cuál debe ser el papel de los sindicatos”, *El País*, 4 de octubre de 1987. Tan sólo *ABC* indicaría como entre González y Saracibar se mantendría «una polémica que según algunos asistentes fue muy dura y según otros, como Guerra, un simple debate». Noticia, Ángel Collado, “Felipe González acusa a UGT de poner en peligro al Gobierno socialista”, *ABC*, 3 de octubre de 1987.

autocrítica— presencia de mayores reflexiones políticas de calado. De hecho, el informe volvía a asemejarse a un documento de trabajo de Economía. Y no era este un detalle menor, pues, el mismo constituiría la base para la ponencia marco del XXXI Congreso socialista a celebrarse en enero de 1988⁴⁵⁴.

Para comenzar se recordaba los duros meses de conflictividad protagonizados por cada vez más amplios colectivos, incluidos el estudiantil. Y una vez más aparecían las maniobras consabidas: no pocas movilizaciones habían estado motivadas por “intereses políticos que buscaban el desgaste del Gobierno en función de la confrontación electoral prevista para el mes de junio”. Lanzada la hipótesis, no se verificaba la misma.

Las *causantes* y las *causas* aparecían específicamente detalladas: la ausencia de concertación social. Resultaba además, que la “discrepancia pública con la UGT cofunde a nuestro electorado y hace más complicada la legitimación del proyecto socialista”. El problema, no obstante, era bien otro. Dentro de la *retórica elitista* y *tecnócrata* se explicaban —desde un claro tono de superioridad— los porqués de tantos desmanes:

«Las justas razones de todo tipo que conducen a una política de moderación salarial como la propuesta por el gobierno no son suficientemente comprendidas por aquellos ciudadanos que entienden que ha llegado la hora de resarcirse de los sacrificios de los años anteriores».

Tocaba seguir con dicha política, pues se mostraban ampliamente convencidos de cómo que la misma “ha sido necesaria, correcta y que comienza a producir efectos positivos en todos los órdenes”. Tras una infinidad de cuadro, gráficos... macroeconómicos en torno a las principales variables, se hablaba de un “éxito” en la superación de la crisis. Y también se resaltaba de cómo habían sido capaces de “hacer frente desde nuestra posición ideológica a las necesidades de España”, lo que habría sido su “mayor responsabilidad”.

Sin nada que rectificar a primera vista, se dedicaría un largo apartado a la concertación social. Primera consigna: “renovar el «compromiso social»”. Segunda: lograr “un clima de paz social”. Y para ello se proponía un conjunto de cuestiones a examinar, a partir de las cuales se pretendía “[a]lcanzar un acuerdo socioeconómico de tres años de duración (1988-1990)”, siempre y cuando se aceptarían las líneas generales de la política económica. No sólo, pues, se proponían varias fases para alcanzar la citada concertación, en donde la política salarial no era cuestionable y la lucha de la inflación no negociable. Inclusive se contemplaban medidas para incrementar el *descuelgue salarial* en caso de “empresas con pérdidas y el procesos de ajuste”⁴⁵⁵. Unos puntos de partida que, a efectos prácticos, no dejaban mucho margen de negociación, tal y como se comprobaría durante aquella misma reunión de la CF del PSOE.

En un ambiente previamente calentado, la UGT lanzaría su último órdago. Conseguir no sólo parar los nuevos sacrificios salariales que se avecinaban, sino además tratar de recuperar parte de la pérdida de poder adquisitivo a través de unas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que se estaban negociando y que sumaban unos 75.000 millones de pesetas, de cara a funcionarios y pensionistas. Enmiendas que en apariencia —cuando menos— constituían unas propuestas bastante sensatas y no radicales con el fin de incorporarlas a los PGE. El encargado de defender las mismas, previamente debatidas en el Comité Confederal de la UGT, sería el miembro de la CF del PSOE Antón Saracíbar y también diputado, quien amenazaría con su capacidad de veto para que los parlamentarios ugetistas no votaran presupuestos de marras.

⁴⁵⁴ AHFFLC, PSOE-CEF, “Proyecto de ponencia marco. XXXI Congreso”, Madrid, 14 de septiembre de 1987, sig. AI-138-02, p. 39. La comisión redactora estaría formada exclusivamente por miembros afines a la dirección socialista: José María Maravall, Francisco Fernández Marugán, Alejandro Cercas, José María Benegas, José Rodríguez de la Borbolla, Ramón Vargas-Machuca, Antonio García Miralles, Juan Manuel Eguíagaray y Higinio Clotas. El citado texto también puede leerse en *El Socialista*, n° 438/439, (1987) [separata] de aquel mismo mes de octubre.

⁴⁵⁵ AHFPI, PSOE-CEF, “Informe de gestión al Comité Federal. Informe Político”, Madrid, 2 de octubre de 1987, sig. Fc 4009 vol. I.

Con una *sensibilidad a flor de piel*, aquel *animal político* que siempre sería Felipe González, perdería *los papeles*. Y como se ha mantenido los *gestos* y las *formas* eran tan importantes dentro de una familia como los contenidos. En mangas de camisa y totalmente fuera de sí, diría:

«Quiero empezar por decir que soy socialista, justamente porque no presumo de serlo – dijo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE– y hay muchos que presumen de serlo y no tienen ni puta idea de por dónde sopla el viento, ni puta idea de lo que pasa, ni de lo que puede pasar, ni de cómo se orienta la política socialista, ni de cuáles son las prioridades de un partido socialista gobernando esta época. Y, lamento decirlo, sin caer en el anecdotario. Lo más terrible es pensar que la diferencia que tenemos es de 60.000 o 65.000 millones de pesetas... Digamos la verdad al menos entre nosotros, ya que no se la decimos a la gente en la calle. Si a mí hace doce años me dicen que la prioridad absoluta es una situación como ésta es discutir el sueldo de los funcionarios no me lo creo, no me lo habría creído»⁴⁵⁶.

Tras no pocas amenazas con su habitual *retórica* prepotente y amenazante –“Tenemos polillas en nuestras vigas; en las vigas del proyecto que tratamos de construir, y las polillas las estamos metiendo nosotros”⁴⁵⁷– el número dos de UGT, a la sazón Secretario de Organización Confederal, le contestaría: “Felipe eres muy duro y muy injusto [...]. Si seguimos por ahí, solo vamos a terminar el proyecto entre partido y sindicato que hemos tratado de construir”. Pero como venía sucediendo desde antes de diciembre de 1982, a la mínima ocasión quien fuera Presidente del Gobierno sacaría a relucir la receta consabida: “Yo sólo trato de evitar que ocurra lo mismo en España, por eso propongo una concertación social que nos permita evitar marginar a ese sector de la sociedad y salvar a los sindicatos”⁴⁵⁸. Volvía a repetirse la historia de siempre. Una historia repetida hasta la saciedad, pero que ya no encontraría eco alguno en las filas ugetistas.

Por su parte, la UGT celebraría su III Comité Confederal ordinario una semana después, en concreto los días 9 y 10 de octubre de 1987. Junto con las dos decisiones políticas de enorme calado que se tomarían en la citada reunión, el informe presentado por la Secretaria General sería una respuesta, punto por punto, a la narrativa socialista en torno a los factores que habían impedido el acuerdo social tantas veces citado. Todo ello con un cambio sustancial: el paso a la ofensiva ante lo que propio Nicolás Redondo entendería como una “campaña orquestada contra la UGT”. Así se advertiría al final de su intervención:

«Y UGT no es precisamente una sociedad que se dedica a la meditación, ni tampoco un club; somos un sindicato que no podemos renunciar a nuestra esencia, como es el defender a la

⁴⁵⁶ GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, op.cit., p. 295. El mismo Alfonso Guerra en sus *memorias*, aunque no da fechas ni mayores detalles, se refiere de pasada a lo que aconteció durante el mes de septiembre y octubre. Narra allí como en un clima de creciente división, González le encargaría reunirse con Redondo, tras una cena entre los tres protagonistas previa en La Moncloa. Cuenta como le solicitaría al Secretario General de UGT que le escribiera en un documento todas sus peticiones y en caso de aceptarlas les diera su apoyo. A lo que el propio Redondo le contestaría, según el propio interesado: «UGT nunca hará público el apoyo a la política del Gobierno». A partir de aquella contestación se trataría de buscar unas «reglas mínimas de convivencia entre el sindicato y el Gobierno, pero sin pretender un acuerdo global, al parecer imposible». Culpa de la ruptura de su papel mediador por igual a la dirección ugetista y a Carlos Solchaga. Y pese a todo trataría de evitar el *no* de UGT a los PGE de aquel mismo año. ¿Cómo? A través de una reunión con Paulino Barrabés y Apolinar Rodríguez de donde saldría un documento. Un texto de mínimos que no sería apoyado por Economía ni por Redondo. Tras la movida reunión del CF escribiría una carta a Paulino Barrabés, que transcribe a continuación y que constituye una buena muestra del fin de las relaciones fluidas entre UGT y Gobierno: «Compañero Paulino: He esperado unos días para descargar la vergüenza que he sentido por vuestra actuación posterior al Comité Confederal. Podría analizar muchos elementos de la cuestión, pero no tengo ánimo para ello, ni esperanzas de que me escucharas. Te diré solo que no es honesto lo que habéis hecho. Un saludo». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., pp. 296 y 297.

⁴⁵⁷ GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, op.cit., p. 295.

⁴⁵⁸ *Ibídem*.

clase trabajadora. Eso es lo nuestro. ¿Quién es, entonces, el perturbador del clima social? ¿El que lo provoca, o el que tiene que defenderse de esa provocación? Tenemos que estar tranquilos, tener paciencia, porque nos van a atacar. Nosotros tenemos un trabajo serio, fascinante, y lo debemos cumplir»⁴⁵⁹.

“[H]emos contemplado con cierta admiración como el acuerdo, perfectamente posible, que se rechazó expresamente hace pocos meses ha pasado a ser exaltado y glorificado hasta constituirlo en una especie de panacea para los males de este país”, se subrayaba con no pequeñas dosis de ironía el *informe* presentado. Se hablaba allí de “cerrazón” por parte del Gobierno pero también de su falta de “autocrítica”. A su juicio, el problema sencillamente consistía en la intransigencia en mantener la previsión de inflación en torno al 5%, a lo que se acompañaría de la lectura crítica de los argumentos y tesis mantenidas por el Ejecutivo como el Partido al respecto.

“Como conclusión puede afirmarse que ha habido un rotundo fracaso en la estrategia trazada por el gobierno que, según se demostró claramente, estaba basada en presupuestos falsos”. Todavía se iba a dar un paso más: “porque carecían de fundamento las acusaciones de que pretendíamos romper la política de contención de precios”.

Lectura de los correspondientes *éxitos* sindicales aparte, como no podía ser de otra manera, y el consiguiente reparto de *culpas* por su parte en relación a la falta de un acuerdo, se incidía en la “paradoja de que se reclame moderación a los sindicatos, desde posiciones fundamentalistas”. Pero ahora sí, los datos manejados por la central socialista pintaban un panorama radicalmente diferente al de las posiciones gubernamentales, en tanto se evidenciaba, en primer término, la pérdida de poder adquisitivo, aunque se hubiera visto frenada momentáneamente por la negociación convenio colectivo por convenio colectivo. Así pues, era la “hora de pensar también en los trabajadores”. También había llegado la hora de frenar los muchos intentos de “regresión social”.

Por lo demás, se intuía ya pasos significativos en la mejora de las relaciones con las Comisiones Obreras. No obstante, lo más trascendente era la consolidación de su progresivo *giro* político-estratégico: “Nunca hemos sacralizado la concertación social aunque la valoremos positivamente”, se llegaría a decir. Para terminar remarcando como “no podemos ser optimistas sobre las posibilidades de acuerdo”, tanto en relación a los PGE como en torno a la propia negociación salarial⁴⁶⁰.

Dos semanas después de la reunión de la CEF del PSOE y una de la reunión de la CC UGT, un sábado 17 de octubre de 1987, el propio Antón Saracíbar se dirigía a Felipe González en calidad de Secretario General del PSOE en los siguientes términos:

⁴⁵⁹ “Intervención del secretario general, Nicolás Redondo”, *Unión*, nº 95, (1987), pp. 5 y 6, respectivamente. En el siguiente número de *Unión* se publicaría su intervención completa, una vez que se había hecho público la renuncia tanto de Redondo como de Saracíbar de sus escaños en el Congreso, y en el caso de este último también de su acta de Diputado. “Coherencia sindical, una realidad a la vista. Intervención de Nicolás Redondo en el III Comité Confederal ordinario celebrado en Madrid los días 9 y 10 de octubre de 1987”, *Unión*, nº 96, (1987), pp. 11-22. De aquella intervención cuanto menos ha de resaltarse un significativo párrafo: «Lo que sí nos parece impropio es estimar la concertación casi una especie de remedio milagrosos para todos y cada uno de los problemas del país o, en el caso de fracasar, como la causante de todos y cada uno de los males de este país». *Ibidem*, p. 13.

⁴⁶⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al III Comité Confederal ordinario”, Madrid, 9 y 10 de octubre de 1987, sig.ant. A/37/42, pp. 1, 3, 4, 5, 9 y 28, respectivamente. Véase asimismo, UGT-CC, “Resolución del III Comité Confederal ordinario de la UGT”, *Unión*, nº 95, (1987). En el punto 6.1. se decía: «Se ha hecho caso omiso de nuestra reiteradas propuestas de diálogo, que siempre han estado encaminadas a conjugar lo económico con lo social, en aquellos apartados de los Presupuestos Generales del Estado que nos son propios como sindicato y que ha mantenido como respuesta la imposición de la política de rentas y precios por parte del Gobierno, con la siguiente ruptura unilateral de concertación». Consúltase también en el citado número, “Balance negociación colectiva. Informe a 30 de septiembre de 1987”, *Unión*, nº 95, (1987), pp. 21-23.

«Estimado compañero Felipe:

Por la presente quiero trasladarte mi renuncia al acta de diputado por la provincia de Vizcaya que el Partido obtuvo en las pasadas elecciones generales.

Como sabes el motivo de mi renuncia se encuentra en la imposibilidad de seguir manteniendo por más tiempo la contradicción existente entre mi responsabilidad en la Comisión Ejecutiva Confederal de la U.G.T y mi condición de miembro del Grupo Parlamentario Socialista que como es fácilmente comprensible, y por otra parte es lógico, va a apoyar en el Parlamento los Presupuestos presentados por el Gobierno que no recogen las reivindicaciones actuales del sindicato en materia presupuestaria.

[...].

Puedes estar seguro del gran sacrificio que para mí representa el tomar una medida que desde luego, no va a beneficiar al P.S.O.E. y seguramente va a generar especulaciones de todo tipo en los medios de comunicación.

[...].

Sin más por el momento, recibe un fraternal abrazo»⁴⁶¹.

Martes 20 de octubre de 1987:

«Estimado compañero:

Aunque el destinatario formal debe ser el presidente del Congreso, en tu calidad de secretario general del Partido Socialista Obrero Español quiero presentarte mi dimisión como diputado de nuestro partido por la provincia de Vizcaya.

Las razones que me llevan a adoptar esta actitud derivan de mis convicciones personales en relación con circunstancias de notoriedad pública.

Por una parte está la clara oposición entre posturas reivindicadas por la Unión General de Trabajadores y las políticas plasmadas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988 remitido por el Gobierno al Parlamento en materia de protección por desempleo, incrementos de retribuciones y pensiones y reformas en la fiscalidad.

[...].

⁴⁶¹ AHFFLC, Fondo Sacaribar, “Carta de José Antonio Saracíbar a Felipe González Márquez, Secretario General del PSOE, Madrid, 17 de octubre de 1987”, sig. 002269-002. Una misiva en donde también se hacía referencia al hecho siguiente: «En efecto, el último Comité Confederal de la UGT ha ratificado las reivindicaciones que viene defendiendo la CEC de la UGT en cuanto a las retribuciones de los jubilados y pensionistas, la cobertura para los trabajadores desempleados y el impuesto sobre la renta. También dicho Comité ha fijado los incrementos a defender para los funcionarios y enseñantes públicos». Por lo demás, destacar como tras la aprobación de *reforma de las pensiones* en 1985, Nicolás Redondo tomaría la decisión de no volver a acudir a la CEF del PSOE en su calidad de Secretario General de UGT. Así lo recuerda el propio interesado: «Personalmente he estado muy marcado por mi contenido de clase [...]. Por eso no podía asumir el incumplimiento de una parte del programa electoral lo que nos llevó a un enfrentamiento que resultó inevitable, ante la dificultad de llegar a acuerdos entre UGT y el Gobierno. Esta circunstancia motivó mi decisión de no acudir a las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en mi calidad de secretario general de UGT, máxime cuando al proponer que se votara una resolución se me contestó que no tenía derecho a solicitar ningún tipo de votación al no ser miembro de dicha comisión ejecutiva». Nicolás Redondo en declaraciones a, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, op.cit., p. 109. En el verano de 1988, Redondo concedería una entrevista al diario *Alerta* que reproduciría *Unión*. Y en la misma se descartaría plenamente entonces la ya remota posibilidad de volver a las reuniones de la CEF: «-Como se sabe, yo no tengo por los estatutos ningún derecho; -P. Pero sí tiene una invitación formal: -No, creo que no. Le tengo un profundo respeto al presidente del Gobierno y respeto su capacidad de dialéctica, de la que es ejemplo la invitación a que se refiere. Pero que no es bueno para nadie: no es bueno para el partido, no es bueno para el presidente del Gobierno, no es bueno para la UGT. No puedo estar en la Ejecutiva del Partido Socialista aceptando, apoyando una serie de medidas que luego, como sindicalista, tengo que combatir. No me parece racional, y lo digo sin crispación». Entrevista, “Nicolás Redondo”, *Unión*, nº 103, (1988), p. 4. Por último, en otra entrevista el mismo Secretario General de UGT se expresaría en estos términos: «Yo me di cuenta que a cada logro de los sindicatos el Gobierno nos pedía que cedieramos nosotros en algún campo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un Gobierno de progreso y otro conservador? Un Gobierno socialista está obligado a tomar medidas progresistas. ¿Por qué nos pedían entonces contrapartidas si lo que nosotros pedíamos era los que estaban obligados a hacer?». Testimonio recogido en, GARCÍA-ABADILLO, Casimiro, *El balance...*, op.cit., p. 19.

Por otra parte existen dos circunstancias que tengo muy presentes: la primera es el deseo de evitar cualquier tipo de malinterpretación en cuanto a que mis condiciones de diputado socialista y secretario general de la Unión General de Trabajadores puedan implicar un medio de presión indebida (se ha llegado a hablar, incluso, de chantaje) para obtener objetivos sindicales. La segunda, y correlativamente, es que las mismas circunstancias no se constituyan en obstáculo para el pleno ejercicio de la acción sindical que amplios colectivos deben desarrollar a favor de sus reivindicaciones.

[...].

Espero poder ampliarte personalmente los motivos de esta decisión y, sobre todo, ratificarte mi interés profundo en que las relaciones entre el sindicato y el partido, organizaciones que tienen su razón de ser en la construcción de un proyecto histórico común, no se vean dañadas por cuestiones coyunturales.

Tuyo y de la causa obrera.

Nicolás Redondo»⁴⁶².

He aquí otro *pequeño momento decisivo* por el que atravesaría la UGT, cargada de razones y de responsabilidad histórica. A partir de esas dos misivas escritas con sinceridad y con una enorme valentía, el estallido de un conflicto tanto dentro de la familia socialista como a nivel externo era una cuestión de tiempo. Y al mismo tiempo, el riesgo de deserciones y conspiraciones dentro de la UGT se incrementaría exponencialmente.

A las dimisiones de Redondo y Saracíbar les acompañarán entre otras la de Cándido Méndez –quien renunciará a su acta como diputado parlamentario de Andalucía– o Emilio Castro –quien sustituiría en la CEC de UGT a Justo Zambrana, “quien se viene distinguiendo desde hace algún tiempo por ser el principal valedor de las posiciones progubernamentales”, como antes había sucedido con José Luis Corcuera⁴⁶³–. Decisiones que conducirían a que, en adelante, el “sindicato carecerá de voz que pueda considerar propia y a través de la cual pueda hacerse oír en sede parlamentaria”⁴⁶⁴. Se estaba ante el fin “del diseño estratégico solidario” que había primado, con todas sus dificultades y limitaciones, desde 1982⁴⁶⁵.

Cartas de dimisión, por tanto, sumadas a no pocos movimientos internos que no se dejarán de repetir en adelante. Así no faltarían maniobras, en adelante, con el fin de desestabilizar la dirección confederal ugetista. Conspiraciones dirigidas y ordenadas tanto desde Ferraz como desde La Moncloa y que tuvieron por objetivo *sacar* a Redondo de la Secretaría General. “Felipe ha dado la orden de reconquistar la UGT”, se llegaría a señalar en el acta correspondiente a la reunión del CEC del 24 de noviembre de 1987⁴⁶⁶.

⁴⁶² “Carta de Nicolás Redondo y Antón Saracíbar renunciando a sus escaños (20 de octubre de 1987)” en VEGA, Rubén, *La reconstrucción de..., op.cit.*, pp. 343-344. Al respecto el propio Vega afirmaría: «Los cantos de sirena que han venido invitando al sindicato a incorporarse a los parámetros de la ‘modernidad’ son rechazados en aras de la fidelidad a principios ideológicos que forman parte de sus señas de identidad. Han bastado seis años de gobiernos socialista para quebrar la armonía hasta un punto ya irreversible, convirtiendo el año del centenario en el que pone fin a un modelo de relaciones que habían resistido un siglo». *Ibídem*, p. 182.

⁴⁶³ *Ibídem*, p. 214. Sobre lo que denominamos como el ‘efecto Corcuera’ véase lo apuntado en la *nota 427*.

⁴⁶⁴ *Ibídem*.

⁴⁶⁵ ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del..., op.cit.*, p. 557.

⁴⁶⁶ *Ibídem*, p. 223. En primer lugar, véase, “Redondo reafirma la autonomía de UGT y pide a los dirigentes que avancen en el trabajo sindical”, *El País*, 25 de noviembre de 1987. Para Guerra la cuestión sería totalmente diferente: «Se aportaban ideas para conducir los problemas hacia zonas de entendimiento y colaboración». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los..., op.cit.*. En cualquier caso, aquella *propuesta* no era la primera vez que se formulaba. De hecho, este tipo de movimientos serían denunciados unos meses antes, justo tras el fin del AES y tras el *giro* del XXXIV Congreso de UGT. En concreto, en una entrevista de Redondo en *El País*. Entrevistado por Joaquín Estefanía y Rodolfo Serrano, confirmaría el deterioro de las relaciones entre UGT y el PSOE, incluido el Gobierno. Allí mismo declararía lo siguiente al respecto de los movimientos internos para *moverle de la silla*: «No quiero caer en victimismos. Lo

Por su parte, la UGT trataría de ganar tiempo y recomponerse internamente frente a tales operaciones. A lo que se le acompañaría de una campaña de imagen, junto con el reforzamiento de su estrategia programática, lo que, en primer término, se concretaría en la una publicación en diciembre de 1987 de *La UGT ante la crisis financiera internacional y las políticas neoliberales*. Un documento en el que se observa ya un recrudecimiento crítico contra las tesis gubernamentales en boga⁴⁶⁷. Aquello se produciría, además, en un momento con un alto valor histórico-simbólico para el sindicato socialista: 1988 era el año de su centenario⁴⁶⁸.

En lo que respecta a la reacción inicial PSOE, en un primer instante, se limitaría a *lamentar* la decisión de Redondo y Saracíbar⁴⁶⁹, mientras que, en paralelo, mantendría su actitud de cerrada obstinación en relación a los PGE. No habría ni entonces ni adelante posibilidad de modificación de los mismos. Un actitud de “no” diálogo que en una coyuntura marcada por un incremento constante de la conflictividad, constatados los límites de las políticas sociales, los escasos resultados del AES tanto en materia de creación de empleo como de protección por desempleo –que seguía a niveles raquíticos⁴⁷⁰– y otras tantas circunstancias, irían alimentando un resentimiento a nivel personal pero sobre todo a nivel político, que pronto tendría su traslación de los despachos a la calle.

A modificar el mapa de las grandes operaciones de la vida política vendría a concretarse otro hecho histórico clave: la salida de Marcelino Camacho de la Secretaría General de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en noviembre de 1987, y la llegada de Antonio Gutiérrez. Acontecimientos que posibilitarían, paulatinamente, una “unidad de acción” que, en la práctica, nunca se había podido llevar adelante desde la legalización de los sindicatos,

cierto es que están poniéndome *chupa de dómene* en algunos ámbitos del partido e incluso de la Moncloa. Debo admitirlo, pero no es la primera vez, aunque yo siempre lo haya negado hasta ahora. Hoy se hace con mayor virulencia, de una manera soterrada, pero la familia socialista es muy permeable y siempre me entero. De esto a moverme la silla hay un trecho que todavía no se ha recorrido. O al menos eso creo. No sé si alguien lo intentará; me preocupa más los felipistas que el propio Felipe». Entrevista, “Nicolás Redondo”, *El País*, 22 de marzo de 1987.

⁴⁶⁷ UGT, “La postura de UGT. Crisis financiera internacional y políticas neoliberales”, *Unión*, n° 97, (1987), pp. 1, 3-4. Una contralectura por parte del socialismo español puede verse en: ZAMBRANA, Justo, “¿Es regresiva la..., *op.cit.*”.

⁴⁶⁸ Consúltase al respecto, VEGA, Rubén, “La quiebra de un modelo centenario” en *La reconstrucción del..., op.cit.*, pp. 181-ss.

⁴⁶⁹ «Con respeto que la decisión le merece, la CEF del PSOE lamenta la dimisión de los compañeros Nicolás Redondo y Antón Saracíbar como parlamentarios. Esta Comisión Ejecutiva no puede compartir la decisión tomada por los compañeros por considerar que es justamente en el seno del Grupo Parlamentario donde deben debatirse las diferentes posturas que defienden sus miembros, mediante el libro juego de mayorías y minorías». Comunicado de la CEF del PSOE publicado en *El Socialista*, n° 440, (1987), p. 1. Un número en donde el lector podría también disfrutar de la lectura resumida de los Presupuestos Generales del Estado para 1988. Igualmente Alfonso Guerra reconocería, en un inusual gesto, como «es más leal abandonar el escaño que votar contra los proyectos del partido». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los..., op.cit.*, p. 292. Por lo demás Astudillo ha afirmado: «Ciertos investigadores han planteado que este dilema apenas era tal porque los dirigentes del PSOE, si bien no buscaron la ruptura con la UGT, ni la temían ni la lamentaban. Aducen para ellos distintos motivos, que van desde estilos de vida y origen social de los líderes del PSOE, lo que les llevaba a menospreciar a sus antiguos compañeros sindicalistas, hasta la fortaleza relativa de su organización en comparación con UGT [...]. Los dirigentes del PSOE se sentían así seguros en su enfrentamiento con la dirección de la UGT gracias a la renovación de su mayoría absoluta en las elecciones legislativas de junio de 1986. Sin embargo, parece que en realidad dentro de este partido no estaban tan seguros de que la ruptura con la UGT no les podría suponer un coste electoral». ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del..., op.cit.*, pp. 567-598.

⁴⁷⁰ Véanse en el Capítulo 8, “Gráfico 26. Evolución comparada de la tasa anual de desempleo en España y el UE, 1982-1992” y el “Gráfico 29. Evolución de la tasas de cobertura (%) neta y bruta del seguro de desempleo, 1982-1992”, entre otros.

excepto en periodos coyunturales y siempre con un carácter temporal⁴⁷¹. También en esta coyuntura pesarían las desconfianzas, los desencuentros incluidas las tradiciones y engaños entre Redondo y Camacho, quienes nunca cuajaron a nivel personal⁴⁷². Ahora bien, las principales razones del enfrentamiento entre UGT y CCOO residirían, a la hora de verdad, en el choque entre dos estrategias sindicales radicalmente distintas entre sí.

Toda una serie factores que se van a ir sumando e interconectando durante el primer trimestre de 1988, va a ir recalentando el ambiente político-laboral. En un escenario ya de acelerado crecimiento económico, y acompañado en no pocas ocasiones de una promoción pública de lo que se conocería como la *cultura del pelotazo*⁴⁷³, se visualizaría con toda su fuerza las contradicciones capital-trabajo como desde hacía años. Especialmente cuando a pesar del propio *boom económico* la cifra de parados, según el INEM, no descendía de los tres millones⁴⁷⁴.

Tenaz al desaliento, desde el Ejecutivo siendo consciente del complicado nuevo escenario que se presentaba, más aún tras los pasos que siguieron a la inicial conformación de la *unidad de acción* entre CCOO y UGT, y la defensa cada vez más cerrada por parte de esta última central de su reconquistada autonomía sindical; trataría de recuperar la iniciativa de la *agenda política*. Y aquí, de nuevo, los jóvenes volverían a ser los inesperados protagonistas de las llamadas al *diálogo social*. En realidad, si se observa con atención todo el periodo en su conjunto, nunca dejarían de serlo.

La historia inmediata que antecede a la convocatoria de la Huelga General del 14 de diciembre de 1988 es, en términos generales, bien conocida. Como bien conocido es el desarrollo de la misma durante aquel miércoles de 14 de diciembre, por más que, hasta el

⁴⁷¹ Véase, en primer lugar, CAMACHO, Marcelino, *Memorias. Confieso que he luchado*, Madrid, Temas de Hoy, 1990, edición a cargo de Marcel Camacho; PÉREZ DÍAZ, Santiago, “La transición de Marcelino Camacho” en JULIÁ, Santos, PRADERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la...*, op.cit., pp. 644-646; y de forma concreta, GUTIÉRREZ, Antonio, “Prólogo. Más allá de la conmemoración del 14 de diciembre” en ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y...*, op.cit., pp. 7-17; y, id., “Los sindicatos y la acción sindical en los años noventa” en *El sindicalismo. Dossier monográfico, Economía y sociología del trabajo*, n° 10, (1990), pp. 38-46. Por último véase, el todavía válido estudio de, SOTO CARMONA, Álvaro, “Comisiones Obreras en la Transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la Huelga General del 14-D (1976-1984)” en RUIZ, David (dir.), *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 451-521.

⁴⁷² En primer lugar, consúltase el documento que la CEC de UGT prepararía tras los primeros contactos con CCOO, y a partir del cual se fundamentaría políticamente la posterior ‘unidad de acción’: UGT-CEC, “Acentuar la coherencia y la fuerza sindical”, *Unión*, n° 100, (1988), pp. 5-6. En aquel número de *Unión* también se reproducía una carta de Nicolás Redondo a Felipe González en el que se establecía un conjunto de puntos –empresa pública, cobertura de desempleo, reforma del INEM, derecho de negociación...– de cara a poder abrir una mesa de concertación: “Carta de Nicolás Redondo a Felipe González, Madrid, 18 de febrero de 1988”, *Unión*, n° 100, (1988), p. 20. Por último, es interesante observar cómo describiría su relación con Camacho el propio Redondo, en una muestra más de la importancia del *factor humano*: «Las relaciones con Marcelino Camacho eran amistosas, sin embargo, era difícil llegar a acuerdos. No quiero decir que Marcelino tuviera un sentido casi mesiánico sobre la política a seguir, pero era mucho más difícil concretar un acuerdo en el que basar nuestras propuestas. Con Antonio Gutiérrez, secretario general de Comisiones Obreras, resultó mucho más fácil llegar a acuerdos e incluso convocar las movilizaciones. Contribuyó mucho a facilitar este acercamiento la gran capacidad y la sintonía entre los secretarios de acción sindical de ambos sindicatos, Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno». Nicolás Redondo en declaraciones a, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, op.cit., p. 167.

⁴⁷³ Véanse los datos apuntados en la *nota 211*.

⁴⁷⁴ Véase al respecto, Noticia, “La cruda realidad de una política económica socialmente inadmisibile”, *Unión*, n° 98, (1988), p. 6.

momento, la bibliografía existente sea bastante exigua⁴⁷⁵. Sin embargo, lo que generalmente se ha pasado por alto cuando no ignorado son los antecedentes de la elaboración del propio Plan de Empleo Juvenil (PEJ). Ello a pesar de su trascendencia para entender no pocas cuestiones relevantes. Entre otras, como UGT, el sindicato hermano, se volvería a cargar de razones durante meses y más meses para dar el muy complicado de convocar, junto con Comisiones Obreras, una huelga general contra un Gobierno socialista. Otro hecho histórico sin también precedentes.

En este contexto, entre los antecedentes de obligado recordatorio, sin ningún género de dudas, se ha de citar la celebración del XXXI Congreso del PSOE, a finales de enero de 1988 – en concreto los días 22, 24 y 24 de enero bajo el eslogan, *Ganar el futuro*–. Garantizado el control interno –pero sobre todo minimizado el potencial riesgo de cualquier *salida de tono* e incluso la posible presencia de potenciales críticos⁴⁷⁶– no faltarían, en todo caso, los movimientos internos previos como ya era una costumbre dentro de la cada vez más desunida familia socialista⁴⁷⁷.

En aquel encuentro el socialismo español se auto-propondría una particular *rectificación* de lo hecho y por hacer, aunque las dinámicas políticas no variaran en lo sustancial, incluidas las siempre llamadas a restablecer el diálogo social. Deterioradas seriamente las relaciones con UGT, más tras el encontronazo y las posteriores consecuencias de la reunión del CF de octubre

⁴⁷⁵ La principal referencia –casi siempre repetida al unísono– sería la recopilación de artículos, noticias y editoriales que se recogerían en, JULIÁ, Santos, *La desavenencia. Partidos...*, *op.cit.*; mucho menos conocida, y por tanto difundida en trabajos académicos, es otra mayor recopilación de documentación en esta ocasión de procedencia sindical: ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y...*, *op.cit.*. Otro trabajo tan desconocido como valioso de cara a una primera aproximación se encuentra en, AGUILAR, Salvador y ROCA, Jordi, *14-D: economía política de huelga*, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1989, texto incluido en el IV volumen de la monumental obra sobre el sindicalismo y el movimiento obrero dirigida por, AGUILAR, Salvador (dir.), *Sindicalisme i canvi social a Espanya, 1976-1988*, VI vols., Barcelona, Fundació Bofill / Fundació Volkswagen, 1991, vol. IV. Asimismo sobre el tratamiento informativo en torno al 14-D, nos remitimos a la tesis doctoral de, SÁNCHEZ CARO, Eliseo, *Análisis informativo de la huelga general del 14 de diciembre de 1988*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2001. Otras referencias básicas desde diferentes puntos de vista, junto con la bibliografía generalista que se ha empleado en este apartado o en otros capítulos de la presente investigación: PALOMEQUE, Manuel Carlos, “Los sindicatos españoles en el umbral del mercado único: de la acción unitaria a la neoconcertación social” en *El sindicalismo. Dossier monográfico, Economía y Sociología del Trabajo*, nº 10, (1990), pp. 62-71; o, JORNADA, Jacint, “Del 14-D al sindicalismo de los años noventa: Una aproximación a la política de los sindicatos en España”, *Sociología del Trabajo*, nº 8, (1989-1990), pp. 31-58 Para una perspectiva estrictamente gubernamental: ESPINA, Álvaro, “Los sindicatos y la democracia española: la huelga general de diciembre de 1988 y sus implicaciones políticas” en id. (comp.), *Concertación social, neocorporativismo y democracia*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, pp. 191-226; y también del mismo autor, id., “Entre la confrontación y la concertación: del 14 de diciembre de 1988 a los acuerdos sociales de 1990 (siete colaboraciones en la prensa diaria)” en *Empleo, democracia y...*, *op.cit.*, pp. 403-431. Otro tipo de relato altamente enriquecedor lo podemos localizar en, CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], “Las sindicales contra el PSOE” en *La sangre de...*, *op.cit.*, pp. 200-212. Visiones generales al respecto de todo el proceso de concertación social en, ROCA, Jordi, *Pactos sociales y políticas...*, *op.cit.*; y en concreto, dos de los trabajos contenidos en, ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos...*, *op.cit.*: id. y VARELA, José, “Pactos sociales y corporativismo en España” (pp. 43-73); y, ESTEFANÍA, Joaquín y SERRANO, Rodolfo, “Diez años de relaciones industriales en España” (pp. 29-39). Complementétese todo lo anterior con lo apuntado en el apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinarias”, y en concreto, la *nota 64*.

⁴⁷⁶ Por ejemplo, escasa sería la presencia ya no de obreros sino de dirigentes sindicales en el mismo. Noticia, “Escasa presencia de sindicalistas en las delegaciones”, *El País*, 14 de enero de 1988.

⁴⁷⁷ Véanse: Noticia, Joaquín Prieto, “Txiki Benegas se a reafirma como «número tres» de la jerarquía del partido socialista”, *El País*, 13 de enero de 1988; y, Noticia, “Felipe González tiene asegurada la aprobación casi unánime de la gestión de la ejecutiva federal del PSOE”, *El País*, 18 de enero de 1988.

de 1987 –en donde se aprobaría el documento marco político para tal Congreso y que había levantado no pocas suspicacias dentro del sindicato socialista⁴⁷⁸– se filtraría a la prensa, en *tiempo y forma*, las oportunas noticias que cuestionarían la *idoneidad* de que Redondo seguiría al frente de UGT⁴⁷⁹. El propio interesado, por su parte, objetaría en torno a la *sinceridad* de aquella llamada al diálogo manifestando como “ya no es época de fabuladores y hay que andar con los pies en el suelo”⁴⁸⁰. Así como no dudaría en culpar al Gobierno, pero también al propio PSOE, de los *efectos negativos* de la *salida progresista* a la crisis, y en donde el incremento del paro figuraba en primer lugar⁴⁸¹. El ambiente pre-congresual anunciaba así un desenlace incierto.

En lo que se llegaría a calificar como una *extraña estrategia*, se trataría de ensayar una apertura a la “izquierda” en busca de la *concertación social* –en lo que no se dudaría de calificar como de una “revisión del pensamiento socialista”⁴⁸²– pero sin renunciar a la política económica seguida por el Gobierno⁴⁸³. Todo un complicado *equilibrio político* de entrada. Entre “las políticas socialistas y el mercado [...] no existe incompatibilidad entre nuestros objetivos y la economía del mercado”. Más aún, “sí existe incompatibilidad entre nuestro proyecto y las consecuencias sociales de una economía abandonada a su propia lógica”, se decía en el *Informe Político* correspondiente⁴⁸⁴.

Lo que no se cuestionaría sería, en modo alguno, la gestión en el campo de lo económico y con una explicación *ad hoc* sobre los conflictos habidos que tenían, a su parecer, una explicación del todo concluyente:

«La salida gradual de una crisis que ha sido prolongada y dura, que ha supuesto costes sociales –fundamentalmente en el terreno del empleo– y que ha requerido un esfuerzo grande de los sectores populares, ha generado conflictos que son el resultado inevitable de la propia dificultad objetiva del proceso y de factores subjetivos asociados a las exageradas expectativas abiertas por la llegada del PSOE al Gobierno, pues no era lógica esperar que se produjera el milagro de superar en un corto espacio de tiempo las dificultades acumuladas secularmente»⁴⁸⁵.

⁴⁷⁸ Allí, por ejemplo, se podría leer: «Los socialistas consideramos que el mercado es un mecanismo impulsor, capaz de coordinar una cantidad ingente y diversificada de decisiones económicas, de fomentar la eficacia y de desarrollar la competitividad competitiva. Por ello queremos conservar su dinámica». AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p. 42. En cualquier caso, los citados recelos sindicales venían produciéndose desde la publicación del primer *proyecto de ponencia*: AHFFLC, PSOE-CEF, “Proyecto de ponencia marco. XXXI Congreso”, Madrid, 14 de septiembre de 1987, sig. AI-138-02.

⁴⁷⁹ Noticia, “El PSOE propondrá un gran pacto para crear 500.000 empleos”, *El País*, 10 de enero de 1988.

⁴⁸⁰ Noticia, Alberto Valverde, “Redondo duda de la eficacia del pacto de empleo propuesto por el PSOE”, *El País*, 12 de enero de 1988.

⁴⁸¹ Noticia, “Nicolás Redondo culpa del aumento del paro al Gobierno socialista”, *El País*, 14 de enero de 1988.

⁴⁸² AHFPI, PSOE-CE, “31º Congreso del PSOE. Informe Político. Memoria de Gestión, 1984-1987”, Madrid, enero de 1988, sig. C 659, t1, p. 27.

⁴⁸³ Noticia, Joaquín Prieto, “El PSOE renovará la oferta de concertación social y propugnará una «nueva cultura de izquierdas»”, *El País*, 10 de enero de 1988.

⁴⁸⁴ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p. 10. Véase, asimismo, AHFPI, PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, 1985-1988, *crónica entre congresos*, Madrid, PSOE / Equipo de Documentación Política, 1988, sig. B 4125. Todo ello a modo de revisión y reactualización de la ‘historia oficial y/o militante’ del conjunto del socialismo español.

⁴⁸⁵ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p. 17. Asimismo

El proclamado *giro social* se fundamentaría, en lo básico, en el *feliz* (re)encuentro entre la *eficacia económica* y la *solidaridad*, por más que no se renunciara a las políticas hasta entonces llevadas a cabo:

«Siendo complejo el equilibrio a conseguir entre eficacia y solidaridad, es función de los poderes públicos, el organizar la solidaridad, discriminando a favor de los que menos tienen y desarrollando programas específicos destinados a prevenir y a reparar la marginación y a garantizar la igualdad de oportunidades en el seno de la sociedad»⁴⁸⁶.

Y no habría mejor lugar que *ensayar* la solidaridad socialista –y de paso la habitual llamada a la concertación, al diálogo social y llegado el caso a la *paz social*– con aquel colectivo tantas veces referido desde la llegada al Ejecutivo. Y que incluso sería nombrado y resaltado por el propio Felipe González en su discurso de investidura en 1982⁴⁸⁷. Nos referimos a los jóvenes. El problema del desempleo juvenil no es que hubiera mejorado o estuviera en vías de solución. No. Al contrario. Pues en realidad –como hemos visto y tendremos tiempo de ver⁴⁸⁸– su situación laboral había empeorado muy sustancialmente en una peligrosa y combinada dinámica de *exclusión laboral-social* a la par que de *frustración colectiva* juvenil intensa.

Si bien, por un lado, la narrativa socialista al *uso* apenas modificaría sus líneas tradicionales de explicación como puede verse en el mismo *Preámbulo* de la tantas veces citada *Ponencia Marco*, bajo el eslogan: “Conquistar el futuro con los jóvenes” –y que constituye otro de tantos ejemplos del empleo de la categoría *juventud* como metáfora de un *problema social*⁴⁸⁹–; por otro, se empezaría a hablar de la necesidad de luchar contra el desempleo juvenil, junto con otras medidas de carácter político y de orientación consensualista⁴⁹⁰.

se avisaría de lo siguiente: «Ante tal problema es preciso reconocer que el voluntarismo no es eficaz. Afrontar los problemas del empleo requiere la consecuencia de una base productiva amplia, poderosa, moderna y competitiva. Lo que no es incompatible con una organización social equilibrada y cohesionada dotada de servicios sociales eficaces que protejan a los ciudadanos al infortunio y eviten desgarramientos sociales graves». AHFFLC, PSOE-CEF, “Proyecto de ponencia marco. XXXI Congreso”, Madrid, 14 de septiembre de 1987, sig. AI-138-02, p. 40.

⁴⁸⁶ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p. 43. En cualquier caso, la única salida que se previa seguía siendo la misma: «[L]a moderación de costes –cuando domina una situación de elevado nivel de paro– constituye un pilar fundamental para una política económica que pretende conseguir un mayor volumen del empleo y de inversión» (p. 35). Véase aquí también las valoraciones al respecto de, RODRÍGUEZ, Julio, “La ponencia económica del 31º Congreso del PSOE”, *Leviatán*, nº 31, (1988), pp. 19-28.

⁴⁸⁷ GONZÁLEZ, Felipe, *Discurso de investidura...*, *op.cit.*, p. 59.

⁴⁸⁸ Véanse aquí, primero, el apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales* y *humanos*”.

⁴⁸⁹ «La juventud es una clave del proyecto socialista. La mayoría de los problemas y desafíos que hoy tiene ante sí la sociedad española afecta de forma particular a la juventud, ya se trate del desempleo, de las bolsas de marginación, de la drogodependencia o del propio enraizamiento de los hábitos y de las instituciones democráticas. Todos estos problemas inciden más intensamente en la juventud que en cualquier otro sector de nuestra sociedad. A la vez, el peso de la población juvenil es hoy proporcionalmente mayor que en cualquier otro período de la historia española. Los jóvenes son portadores de una sensibilidad social y política nueva en la que los valores de la justicia, la solidaridad y la libertad ocupan un lugar central. Estas mismas generaciones crecidas en democracia son, sin punto de comparación, las más cultas de nuestra historia, aquellas que han alcanzado un nivel educativo medio más elevado. Por todo ello, la juventud es una clave del futuro del Proyecto Socialista. Ofreciendo a los jóvenes programas en el campo de la economía y del empleo, de la educación y de la salud, del asociacionismo y de las mentalidades, seremos capaces de aportar al socialismo un impulso y una energía nuevos. Seremos capaces de ganar codo a codo con los jóvenes un futuro en el que prevalezcan los valores que dan sentido a la vida humana». Líneas más adelante se hablaría con no pocas dosis del tradicional populismo socialista acerca de lo siguiente: «Las desigualdades más lacerantes, las desventajas más profundas son las menos ruidosas, las más silenciadas. Así sucede con los que soportan en España unos niveles de vida que permiten considerarlos pobres; con los trabajadores desempleados; con parte de

Empecemos por esto último. Según los propios socialistas, de lo que se trataba era de compaginar el camino único posible seguido hasta entonces—todo ello bajo el reto de alcanzar la “competitividad”— a través del cual se pretendía asegurar un “crecimiento [que] es necesario y que sigue siendo la condición que asegura la prosperidad”, y que su vez, garantice un “relevante generacional no traumático, el que atenúa la radicalización de los conflictos ocasionados por la lucha a favor de la reducción de las desigualdades y de una más justa distribución de la renta”⁴⁹¹.

Para los socialistas, en adelante, el *problema social juvenil* se transformaría en la primera prioridad del Gobierno, según el mismo documento. Se repetirían allí los argumentos y razones esgrimidas en octubre de 1987, tras volverse a remarcar como se trataba de una “generación que puede instalarse en la falta de oportunidades sociales, en la desesperanza y en el escepticismo”⁴⁹². Así pues, y tras el recordatorio oportuno de las medidas específicas laborales siempre insertas dentro de la “única política posible” —flexibilidad, moderación salarial, déficit público...— se presentaría, a modo de novedad, el “Plan de Acción Integral de la Juventud”. “La solidaridad humana se basa en la solidaridad entre las generaciones”, se remarcaría en *negrita* para despejar, a buen seguro, *dobles lecturas*. Allí se expondría todo un conjunto de buenas intenciones programáticas en línea con la tradición socialdemócrata. Se hablaría, por ejemplo, de “[m]edidas de fomento de empleo que favorezcan la entrada en el mercado de trabajo, que establezcan planes de empleo vinculadas con la formación profesional”⁴⁹³.

Sin embargo, y por más que antes, durante y después del XXXI Congreso se insistiera en que uno de los objetivos centrales tanto del Partido como del Gobierno sería la lucha contra el desempleo juvenil, se evitaría trasladar de forma automática y literal la propuesta de desarrollar un “plan de empleo juvenil”, tal y como aparecía recogido en la ponencia de septiembre de 1987. En realidad, el documento de la *Ponencia Marco* evitaría posibles puntos de conflicto o disenso así como llegaría a enero de 1988 un tanto rebajado en contenidos políticos. Si en la primera versión se hablaría —así como se subrayaría— de cómo “[e]n muchas naciones, a pesar del esfuerzo realizado, han sabido y constatado que por sí solo el crecimiento no elimina el desempleo”, en el segundo tales matices desaparecerían previo paso por la Comisión Redactora⁴⁹⁴.

Limado en extremo el mismo, por ejemplo, también se descartaría dentro del apartado “Los ejes de la política socio-económica” el siguiente párrafo: “Será necesario elevar la tasa de crecimiento de la economía, coordinar con otros países sistemas de reparto de trabajo, realizar un plan de empleo juvenil y mejorar los sistemas y las condiciones de cobertura del

los pensionistas o con los jóvenes sin empleo y enfrentado a un horizonte de incertidumbre. Su voz es la voz de la que debe hacerse eco, primordialmente, el socialismo democrático». AHFPI, PSOE-CE, “31º Congreso del PSOE. Informe Político. Memoria de Gestión, 1984-1987”, Madrid, enero de 1988, sig. C 659, t1, pp. 10 y 21, respectivamente.

⁴⁹⁰ «En la nueva situación española no faltan, sin duda, los problemas. Tenemos aún muy serios problemas en materia de terrorismo [...] importantes pasos que dar para corregir injusticias y desigualdades, una ingente tarea que realizar para dotar a los jóvenes de mecanismos que permitan su integración en el sistema social y posibiliten su participación institucional». AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 31 Congreso del PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid 2 y 3 de octubre]”, Madrid, 1988, Fc 652, p. 19.

⁴⁹¹ AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 31 Congreso del PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid 2 y 3 de octubre]”, Madrid, enero de 1988, Fc 652, p. 29.

⁴⁹² AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 31 Congreso del PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid 2 y 3 de octubre]”, Madrid, enero de 1988, Fc 652, p. 31.

⁴⁹³ AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 31 Congreso del PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid 2 y 3 de octubre]”, Madrid, enero de 1988, Fc 652, pp. 38-39.

⁴⁹⁴ Véase la *nota 454*.

desempleo”⁴⁹⁵. Los porqués y las causas de tal *borrado* se desconocen, pero son tanto o más significativos de lo que sucedería después.

Así mismo nuevos y apasionantes retos esperaban al proyecto *modernizador socialista*. El primero y más importante: *Ganar el desafío europeo*. El objetivo: llegar a una sociedad más justa y eficaz y garantizar “el nivel de vida y bienestar de los ciudadanos de España sea equivalente al que poseen los habitantes de los principales países industrializados”⁴⁹⁶. Y para ello se configuraba una nueva *misión histórica*:

«En adelante, el marco de referencia está claro para nuestro país. Europa es el espacio propio de progreso y solidaridad. Tenemos un destino ligado al resto de países democráticos de Europa y nuestro progreso económico y social va a correr en paralelo con el de ellos. Por lo mismo, España aparece asociada al proyecto de construcción política de Europa»⁴⁹⁷.

Pese a que los documentos congresuales de cualquier organización política tan sólo constituyen una parte (y en muchas ocasiones menor cuando no totalmente secundaria), en paralelo, a las dinámicas políticas subyacentes de tales encuentros; en ocasiones, resultan altamente significativos de las propias transformaciones político-ideológicas de la organización en cuestión. Así pueden llegar a revelar no pocos indicios de cambios sustanciales en la concepción global que se tiene de la sociedad, pero, al mismo tiempo, de la evolución de determinadas culturas políticas. Si señalamos lo anterior es por la suma de evidencias que la propia *Ponencia Marco* del treinta y un Congreso socialista, contenía al respecto de la radical transformación con respecto al alejamiento de cualquier tipo de identidad obrerista en relación al PSOE. Un *giro* que culminaría en el siguiente 32º Congreso en noviembre de 1990.

La primera de esta serie de evidencias se podía detectar, justamente, cuando se refiere a los *emprendedores* –todavía era temprano dentro del lenguaje político socialista para hablar de empresarios sin que chirriara tal documento entre sus potenciales lectores– al referirse a los mismos como los principales creadores de la riqueza del país, y al proponer fomentar,

«la actividad emprendedora de los hombres y de las mujeres que se deciden a tomar riesgos, a descubrir oportunidades de invertir, a establecer actividades productivas que generen riqueza y puestos de trabajo. Una nueva generación de este tipo de agentes sociales necesita la economía y la sociedad española»⁴⁹⁸.

La segunda pequeña-gran evidencia vendría de la mano de la *nueva* –como “singular”– concepción del ciudadano como *usuario* y *consumidor*, antes que por su situación en materia de desarrollo de derechos políticos y sociales:

⁴⁹⁵ AHFFLC, PSOE-CEF, “Proyecto de ponencia marco. XXXI Congreso”, Madrid, 14 de septiembre de 1987, sig. AI-138-02, p. 40. El mismo el *número 3* del PSOE Txiki Benegas declararía: «Nuestro interés [...] es que se produzca un debate en profundidad. La ponencia-marco en el nuevo sistema de Congreso que hemos establecido y que ponemos por primera vez en práctica en esta ocasión, es un documento de partida donde se trata de encuadrar los temas que deben ser debatidos por la Organización. Por tanto, es un documento abierto, susceptible de modificaciones, de enmiendas y de todo tipo de aportaciones». “Pacto de Estado en la lucha contra el terrorismo”, *El Socialista*, nº 437, (1987), p. 4.

⁴⁹⁶ AHFPI, PSOE-CE, “Ponencia marco [al] 31 Congreso del PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid 2 y 3 de octubre]”, Madrid, enero de 1988, Fc 652, p. 39.

⁴⁹⁷ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p. 19. Una *nueva* ‘misión histórica’ en donde a los trabajadores les esperaba un gran cometido de cara al inmediato futuro: «Los trabajadores también han de ser capaces de responder al desafío, ya que su respuesta resultará imprescindible en un mercado abierto en el que la solidaridad es una exigencia, pero también lo es la eficiencia. Para todos la integración es un reto, en el que será preciso ir logrando una sociedad más equitativa y eficaz». *Ibidem*, p. 27.

⁴⁹⁸ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p. 57.

«El ciudadano en su condición de usuario y consumidor, se encuentra en situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión generadas y producidas por el sistema económico. Por ello, los poderes públicos han de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios»⁴⁹⁹.

Y en lo que respecta a la tercera gran evidencia del alejamiento, a pasos agigantados, de la antes siempre defendida centralidad obrera, se intuía sin grandes dificultades. Por más que a las clases populares y trabajadoras se les reconociera el protagonismo necesario así como su *solidaridad y sacrificio* en ese camino común de todos llamado la *salida progresista a la crisis*; para empezar se detectaba un cambio *no positivo* en la actitud del movimiento sindical. Tendencias poco propicias para la deseada *solidaridad socialista*.

De “dificultades complementarias” se calificaría para la marcha del proyecto de modernización socialista, la conflictividad social y la ausencia de concertación. No sólo, pues, se detectaba también la aparición de determinadas actitudes *corporativistas* dentro de los gremios laborales. De esta forma,

«en los momentos de crisis es frecuente la aparición de posturas corporativistas. Nuestra concepción nos lleva a manifestar que en esas circunstancias además de atender a los intereses de la clase obrera empleada, será necesario contrarrestar los fermentos de insolidaridad y egoísmo, que puedan prender en ciertas capas cuando anteponen sus intereses a los de los sectores sociales débiles y de escasa organización»⁵⁰⁰.

Ni una sola línea, por cierto, se hablaría de la *precarización laboral*. Y tan sólo unas pocas líneas de dedicaría a la dualización laboral –y no estrictamente laboral–⁵⁰¹. Fenómenos que habían debilitado la capacidad de respuesta del movimiento sindical en su conjunto.

La *raíz* de los conflictos obreros y sociales habidos, se explicarían por los “intereses corporativos opuestos a las reformas emprendidas por el Gobierno”. Asimismo “[s]e creó un clima de amplia protesta, en muchas ocasiones alentado por intereses políticos que buscaban el desgaste del Gobierno cara a la confrontación electoral prevista en el mes de junio”⁵⁰². El problema, pues, residía en la falta de comprensión de la ciudadanía –se omitía la palabra obrero u obrera– ante la *única política posible*:

«Las justas razones de todo tipo que conducen a una política de moderación salarial como la propuesta por el Gobierno no son suficientemente comprendidas por aquellos

⁴⁹⁹ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p. 45. Todavía se remarcaría a continuación lo siguiente: «el fortalecimiento de un movimiento de consumidores y usuarios que actué como un motor de la modernización y de estímulo de las actuaciones de los poderes públicos». *Ibidem*.

⁵⁰⁰ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p. 45.

⁵⁰¹ A partir de todo un juego de palabras de cara a evitar las críticas o autocríticas –según se quiera interpretar– de aquella misma *Ponencia Marco*, saldría una ‘curiosa’ interpretación histórica por parte de los socialistas acerca de su visión sobre tal proceso: «Ha tomado cuerpo en varios países una suerte de ‘egoísmo de masas’ que se desatiende de la suerte de los desfavorecidos y de quienes no son capaces de abrirse paso en la competición social. Estas concepciones están vinculadas a la tendencia apuntada en la mayoría de las naciones desarrolladas hacia una dualización de la sociedad: de un lado trabajadores cualificados, protegidos y convenientemente remunerados; de otro, una masa de personas desamparadas y abandonadas a su suerte, en la que se incluyen de modo especial un elevado número de mujeres, jóvenes, desempleados, disminuidos físicos y psíquicos, ancianos, enfermos». AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p.22. De cara a un planeamiento sociológico al respecto véase el trabajo de uno de los principales ‘soportes intelectuales’ del socialismo español: TEZANOS, José Félix, “La identidad de la izquierda. Entre la autonomía y la fragmentación”, *Leviatán*, nº 46, (1991), pp. 47-70.

⁵⁰² AHFPI, PSOE-CE, “31º Congreso del PSOE. Informe Político. Memoria de Gestión, 1984-1987”, Madrid, enero de 1988, sig. C 659. t1, p. 30.

ciudadanos que entienden que ha llegado la hora de resarcirse de los sacrificios de los años anteriores»⁵⁰³.

Ya en clave interna y tras volver a remarcar los objetivos del *desafío europeo*, se abrigaba la todavía esperanza de que los caminos de diálogo y comprensión entre el Sindicato y el Partido no se rompieran definitivamente:

«La perspectiva de futuro que aquí se esboza hace ver bien a las claras que el elemento de la identidad entre el Partido Socialista y la UGT no es otro que la existencia de un proyecto común de reforma y transformación de la sociedad. Clarificar mediante el debate sincero, la identidad en torno a ese proyecto común es, por tanto, más allá de conflictos concretos que hoy se plantee, la acción prioritaria a desarrollar entre PSOE y UGT»⁵⁰⁴.

A nivel interno, por otro lado, empezaba a preocupar seriamente dentro del Partido su situación de desapego en relación a la sociedad. Se hablaría, entonces, de “distanciamiento respecto a la sociedad, donde han encontrado eco las acusaciones de prepotencia”⁵⁰⁵. Tras la correspondiente glosa de su gestión –“Su contribución a la democracia, el comportamiento global del Partido y el individual de sus militantes han sido ejemplares”– se detectaría además “fenómenos de clientelismo y de oligarquización. Tales fenómenos constituyen un peligro que tenemos siempre que combatir”⁵⁰⁶.

Inaugurado el Congreso, en buena medida se repetiría lo acontecido en el XXIX y el XXX congresos. A saber, por un lado, por más que las posiciones de los críticos salieran a relucir sus posibles efectos adversos quedarían, a la hora de la verdad, reducidos a la prensa⁵⁰⁷. Y ello a pesar de que Izquierda Socialista conseguiría aglutinar más del 20% de los votos de los delegados, lo que no era poco teniendo en cuenta las circunstancias organizativas descritas en anteriores apartados⁵⁰⁸. En segundo lugar, el Congreso se leería en clave partidista pero también gubernamental –en otro de esos *ejemplos perfectos* del *partido* como correa de transmisión del *ejecutivo*– en tanto se anunciaban cambios en el Gobierno tras el mismo, una vez conformada la nueva ejecutiva⁵⁰⁹.

⁵⁰³ AHFPI, PSOE-CE, “31º Congreso del PSOE. Informe Político. Memoria de Gestión, 1984-1987”, Madrid, enero de 1988, sig. C 659, t1, pp. 30-31. Al respecto resultaría revelador un artículo publicado en la prensa de Javier Pradera, quien llegaría a hablar de cómo los socialistas, a partir de su ponencia económica, se habían convertido en los «guardianes de la ortodoxia a la hora de ocluir los conductos de la crítica interna mediante las exhortaciones a la disciplina». PRADERA, Javier, “El menú macroeconómico”, *El País*, 22 de enero de 1988.

⁵⁰⁴ AHFPI, PSOE-CE, “31º Congreso del PSOE. Informe Político. Memoria de Gestión, 1984-1987”, Madrid, enero de 1988, sig. C 659, t1, p. 31.

⁵⁰⁵ Véase, al respecto, Noticia, “La dirección del PSOE teme que la sociedad no perciba nítidamente sus propuestas”, *El País*, 19 de enero de 1988. Muy relevante al respecto sería el posterior artículo de, VARGAS-MACHUCA, Ramón, “De la mala conciencia a la conciencia posible: 31º Congreso del PSOE”, *Leviatán*, nº 31, (1988), pp. 5-18.

⁵⁰⁶ AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31º Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, enero de 1988, sig. Fc 652, p. 18.

⁵⁰⁷ Véanse: SANTESMASES, Antonio, “El declive del felipismo”, *El País*, 18 de enero de 1988; Noticia, Juan González Ibáñez, “«Ninguna política se puede considerar adecuada mientras haya tres millones de parados»”, *El País*, 21 de enero de 1988, en donde se recogía unas declaraciones del ‘crítico’ Ricardo García Damborenea. En cualquier caso véase, AHFPI, PSOE, “Memoria de enmiendas: 31 Congreso. PSOE, 22-24 [de] enero 88”, Madrid, 1988, sig. C 665.

⁵⁰⁸ Noticia, “La minoría crítica logró el 22,5% de los votos”, *El País*, 25 de enero de 1988. Sobre la estructura organizativa del PSOE y de sus respectivos congresos, se habló largo y tendido en el apartado “4.3. Un partido para el poder: la cultura organizativa del socialismo”.

⁵⁰⁹ Noticia, “Felipe González considera la inclusión de ministros en la ejecutiva en función de la crisis de Gobierno”, *El País*, 22 de enero de 1988. Véase lo apuntado en la *nota* 424.

Con un 97,5% de los votos a favor del *Informe Gestión* de la Comisión Ejecutiva, por y a través de un fortalecido control del voto por delegación que evitaría cualquier posible disgusto, se ratificaría la política económica hasta entonces seguida⁵¹⁰. Una política económica que centraría, a partir de entonces, sus esfuerzos tanto del crecimiento económico pero sobre todo en el aumento del empleo juvenil –como ya se ha examinado– sin renunciar a la búsqueda de la concertación social⁵¹¹. Argumento sobre el que valdría el PSOE en mayo del mismo año para lanzar un conocido documento sobre el que nos detendremos a continuación.

Por último, se configuraría una nueva CEF sin *disidentes* ni *críticos* y totalmente afín al bloque hegemónico del Partido⁵¹². No obstante –como se remarcó previamente– podía ya intuirse *pequeñas grietas* dentro de ese mismo bloque entre lo que, en breve, se denominarían como *felipistas* y *guerristas*.

Alejados de las *lecturas triunfalistas* en clave interna que se realizarían inmediatamente, dicho Congreso tendría dos escollos no resueltos. El primero, lo destacaría el mismo Joaquín Almunia: “[n]o hay debate sobre nada. Se debaten espacios de poder, espacios de influencia, lealtades personales, castigos a los desleales y premios a los leales”⁵¹³. No se cierran los problemas internos que a pesar de ser detectados, su solución se pospone para futuras ocasiones. En cualquier caso, el principal y más grave problema será la constatación de la *ruptura* de los canales de diálogo entre UGT y el PSOE y la progresiva diferenciación del proyecto común. “Tanto Nicolás Redondo como Felipe González evitaban llegar a la ruptura pero ambos dejaron claras las muchas diferencias que les separan”, se afirmaría en la prensa a la vista de las palpables tensiones percibidas a lo largo de esos días⁵¹⁴.

A buen seguro mucho pesarían las tesis mantenidas en la ponencia política como en la económica –que tal y como hemos visto no se caracterizarían, exactamente, por su contenido social u obrero–; y también pesarían las ya serias desconfianzas entre ambas organizaciones. De nada o poco valdría las llamadas –vía resoluciones aprobadas⁵¹⁵– a la concertación social cuando el propio González defendería, sin fisuras, la necesidad de continuar con la misma política económica⁵¹⁶.

A pesar que el lunes 25 de enero en la fotografía de portada de *El País* aparecieran en la misma Felipe González, Nicolás Redondo y Ramón Rubial en primer plano, no se podía ocultar la gravedad por la que atravesaban las relaciones entre el Partido y el Sindicato. Al final de aquel XXXI Congreso el discurso más recordado por los dirigentes y delegados socialistas sería el pronunciado por Nicolás Redondo, en calidad de Secretario General de la UGT.

El líder sindicalista aprovecharía el último día del mismo –el domingo 24 de enero– para remarcar y defender la nueva concepción estratégica ugetista. Comenzaría entonces con un

⁵¹⁰ Véanse respectivamente: Noticia, “La gestión de la ejecutiva, aprobada por el 97,5% de los votos”, *El País*, 23 de enero de 1988; Noticia, “Los 33 jefes de delegación, controlan con su voto las decisiones claves”, *El País*, 23 de enero de 1988; Noticia, “Ratificada la política económica defendida por Felipe González”, *El País*, 24 de enero de 1988.

⁵¹¹ Noticia, “El crecimiento y la creación de empleo juvenil, prioridades para la economía”, *El País*, 25 de enero de 1988.

⁵¹² Véase la composición de la CEF entrante en el Capítulo 5, *nota 113*.

⁵¹³ Declaraciones de Joaquín Almunia a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, p. 332. Una contravisión a tener presente en: ESCUDERO, Manuel, “La pluralidad de sensibilidades en el PSOE”, *Sistema*, nº 102, (1991), pp. 19-30.

⁵¹⁴ Noticia, “El congreso no resolvió el enfrentamiento en la «familia socialista»”, *El País*, 25 de enero de 1988.

⁵¹⁵ AHFPI, PSOE, “*Para ganar el futuro* (Resumen de las resoluciones del XXXI Congreso del PSOE)”, Madrid, PSOE, 1988, sig. Fc 729.

⁵¹⁶ Noticia, “Felipe González reprocha a UGT no reconocer los logros de la gestión socialista”, *El País*, 25 de enero de 1988.

tono pedagógico, remarcando las *diferencias* existentes entre el Gobierno y UGT, no sin antes reclamar el *derecho a debatir* pero también de *refutar* las políticas gubernamentales. Así pues, de entrada, recordaría que,

«[n]o se trata, por lo tanto, de buscar explicaciones forzadas o complacientes donde sólo hay razones objetivas ya que pura y simplemente, lo que sucede es que UGT no está de acuerdo con medidas y políticas adoptadas por el Gobierno socialista (como la imposición de topes salariales, recortes en protección social o el propio cuestionamiento del sector público) por considerarlas lesivas para los trabajadores y contrarias a nuestra política».

En medio de una creciente expectación, repasaría allí el balance que le merecía –en nombre de la UGT– la gestión del Gobierno socialista. La conclusión: no había motivos para las posturas demagógicas de la derecha, pero tampoco espacio para los habituales discursos triunfalistas que se realizaban desde el Partido como desde el Gobierno:

«Así, constatado que se ha realizado, efectivamente, un fuerte saneamiento económico, no deja de ser cierto, y como sindicato nos corresponde decirlo, que la política de ajuste no ha conllevado un mejoramiento de los indicadores sociales básicos, y por el contrario, consideramos que hay más paro, que se ha acentuado la desigualdad de la distribución de la renta, que hay menor proyección pública en algunas áreas fundamentales como el desempleo o la invalidez y más dualidad social y geográfica con el declinar irreversible de algunas regiones de nuestro país. Asimismo se manifiesta un palpable divorcio entre el Gobierno y las organizaciones obreras, situación muy preocupante que no se puede imputar a la mala fe o la política sindical practicada».

El tenso silencio daría paso ahora ya al nerviosismo. El propio Redondo, entonces, no perdería tan magnífica oportunidad de reclamar, sin ambigüedades, la hora del *giro social*:

«Sería plantear un falso debate, forzado y justificativo, la contraposición entre el crecimiento y reparto. La apuesta por el crecimiento, por la recuperación económica, es una activo de toda la sociedad que comparten sin excepción las fuerzas políticas y sociales y, por tanto, también viene siendo defendida por los socialistas y por el movimiento obrero».

Un discurso que concluiría con un *llamamiento* y que frustraría las por sí escasas expectativas de reencuentro entre el Partido y Sindicato: “La innovación a la modernidad no debe hacernos olvidar las ideas siempre vigentes en la transformación de la sociedad”⁵¹⁷.

Precisamente aquel discurso empañaría, en gran medida, la proyección pública del 31º Congreso socialista⁵¹⁸. Pero no era aquello la consecuencia más grave, pues, en verdad, el paso dado por la UGT muy pronto tendría sus consecuencias políticas a nivel externo como a nivel interno. La ruptura de la familia socialista era una realidad política. Una realidad que se consumaría en los siguientes meses.

Los *presagios* pre-congresuales se habían cumplido. Su confirmación vendría de la mano de la celebración, con carácter urgente y extraordinario, del Comité Confederal de la UGT el viernes 29 de enero de 1988. Junto algún que otro movimiento interno –empezando por el nombramiento de Emilio Castro como el nuevo Secretario de Acción Institucional Confederal–

⁵¹⁷ AHFFLC, UGT, “Intervención del Secretario General de la Unión General de Trabajadores ante el XXXI Congreso del Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, 24 de enero de 1988, sig., Fa 2800, pp. 6, 7, 10, 12 y 17, respectivamente. Asimismo puede leerse la misma en, “Intervención del secretario general de UGT, Nicolás Redondo en el XXXI Congreso del PSOE”, *Unión*, nº 99, (1988), pp. 11-14. En torno a tal trascendental discurso Astudillo afirmarí: «Finalmente, el Secretario General de la UGT, con ocasión del 31º congreso del PSOE celebrado en enero de 1988, dejó bien claro que el modelo solidario de relaciones entre ambas organizaciones dejaría de interesar a los ugetistas si valoraban que aquellas relaciones no constituirían la mejor estrategia para influir en el ámbito político». ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, op.cit., p. 568.

⁵¹⁸ Portada, “El congreso del PSOE finalizó sin resolver el enfrentamiento con UGT”, *El País*, 25 de enero de 1988; Noticia, “Felipe González reprocha a UGT no reconocer los logros de la gestión socialista”, *El País*, 25 de enero de 1988. Véase también, Editorial, “Alarma en la balsa de aceite”, *El País*, 25 de enero de 1988.

se pretendería salir al paso de los resultados que había llevado aparejado el final del 31º Congreso del PSOE. Así pues, primero se reforzaría la coherencia organizativa interna. Segundo, en previsión de lo que pudiera venir, se defendería una política salarial “consecuente” así como se fijaría la tabla reivindicativa para todo el año 1988 y que, en suma, iba a configurar el *programa de acción* de la central socialista de cara al 14-D⁵¹⁹. Por parte del propio Nicolás Redondo no se dejaría pasar la oportunidad para realizar un completo balance de las experiencias acumuladas a lo largo de todo el proceso negociador habido en 1987, más aún tras la *salida* del Congreso socialista. En ese contexto, finalmente, terminaría atacando, de forma dura, tanto la política económica socialista como su consecuencia más inmediata: la precarización laboral⁵²⁰. Ello con un mensaje final:

«Lo que nadie debe olvidar es que la credibilidad de un Gobierno se juzga por las leyes que promueve, y la credibilidad de un sindicato se juzga sobre su negociación, sobre su defensa estricta de los intereses de los trabajadores»⁵²¹.

Jóvenes y mercado de trabajo siempre han resultado en la política española contemporánea una combinación explosiva. Sabedores desde el Partido que no podían perder de forma permanente y definitiva las relaciones y posibles alianzas con UGT –todavía más teniendo en cuenta el riesgo de que la *unidad de acción* se fuera consolidando y con él se dejaría a un lado la permanente “lucha fratricida” entre los dos principales sindicales del país⁵²²– se trataría de abordar una posible revisión de las medidas laborales juveniles. Como había sucedido en otras ocasiones –por ejemplo, en el caso del propio AES– sería desde el propio PSOE –antes que desde el Gobierno, a quien ahora sí se le tildaba directa y llanamente de *neoliberal*– desde donde saldría la iniciativa de recomponer los puentes de entendimiento en el seno de la familia socialista.

Después de algún que otro tanteo, y tras la celebración del 1º de Mayo⁵²³ y no pocas reuniones, el PSOE redactaría y entregaría a los sindicatos el documento titulado: *Medidas para la inserción y el empleo de los jóvenes*⁵²⁴. El objetivo: reabrir una mesa de diálogo social.

⁵¹⁹ “Resolución del Comité Confederal extraordinario de UGT”, *Unión*, nº 99, (1988), p. 3.

⁵²⁰ «Hoy vivimos en un momento de logros económicos, pero junto a ello están el paro y la pobreza [...]. Existe tal precariedad en el mundo del trabajo, que de los seis millones y medios de contratos que se han hecho en los últimos años solamente 130.000 tenían carácter indefinido. Solamente el 1,8 por 100 de los contratos. Y esto es preocupante a nivel sindical y a nivel social. ¿Hacia donde vamos, compañeros?». “Intervención del secretario general de la UGT. Análisis de una situación”, *Unión*, nº 99, (1988), p. 22.

⁵²¹ “Intervención del secretario general de la UGT. Análisis de una situación”, *Unión*, nº 99, (1988), p. 22.

⁵²² De nuevo Astudillo ha planteado una lectura a tener presente: «La dirección de UGT escogió la unidad de acción con CCOO como forma de intervenir en política una vez que constató que efectivamente las relaciones solidarias con el PSOE no eran el recurso que había esperado. Hasta que no se convencieron de ello, no buscaron coordinar sus actuaciones con la dirección de CCOO». ASTUDILLO, Javier, *Los recursos de..., op.cit.*, p. 579. Para más adelante argumentar: «Es decir la UGT se fijaba como objetivo acercar posturas con CCOO para evitar la lucha fratricida en el ámbito laboral y terminar en situaciones subóptimas para ambos sindicatos. La creencia de que cada sindicato por separado no obtendría mucho de cara a sus relaciones con los otros agentes (empresarios o Gobierno) y que, de hecho, les perjudicaba era igualmente compartida por CCOO». *Ibidem*, pp. 584-585.

⁵²³ Para aquellas fechas UGT había iniciado un progresivo endurecimiento que se reflejaría, justamente, en su Manifiesto para el 1º de Mayo de 1988, en donde se destacaría lo siguiente: «Las medidas específicas para fomentar el empleo entre los jóvenes y las mujeres deben enfocarse, desde nuestro punto de vista, sin perder de vista que el problema del empleo es uno sólo y no pueden pretenderse soluciones para unos en detrimento de otros. Destaquemos además para estos colectivos como para otros la urgente necesidad de implantar una formación intensa, eficaz, orientada y socialmente gestionada». UGT, “Por un compromiso de empleo”, *Unión*, nº 102, (1988), p. 3. También en aquel

Nos encontramos en mayo de 1988. En apariencia y contenido aquel documento parecía haber salido directamente del Gabinete Técnico del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Por no llevar no llevaba ni el logo del PSOE o iba firmado. De esta forma, más que un documento de trabajo político, era sencillamente, el planteamiento jurídico-técnico previo a una modificación del ordenamiento jurídico-laboral. Un texto que supone, por otro lado, el antecedente directo del PEJ que se aprobaría unos meses más tarde, en concreto en octubre de 1988. Así pues, detengámonos en su contenido, ya que aporta no pocas pistas de los motivos de la convocatoria de huelga general del 14 de diciembre de 1988.

Como se ha adelantado, los *jóvenes* volverían a aparecer representados como un problema laboral a la par que social, al que había que dar una drástica solución. Nuevamente se volverían a repetir *diagnostico y pronostico*. En realidad, no habría muchas novedades. Tantos los argumentos como las soluciones propuestas caminarían por donde venían transitando desde muchos antes de la llegada al poder de los socialistas. En concreto, desde la aprobación de la LRL allá por abril de 1976.

El *mal* a extirpar a modo de diagnóstico: el *paro juvenil*. El pronóstico a modo de solución: más *flexibilidad laboral*, dentro de una progresiva como continuada reducción de derechos laborales por la vía del BOE, junto con una reducción del coste de la mano de obra. Abaratamiento como precarización a través de una doble vía: disminución de la retribución monetaria pero también por el aumento de las facilidades económicas al empleador con el objetivo de contratar a jóvenes—a partir de tres posibles caminos: vía de las subvenciones, vía desgravaciones o vía cotizaciones sociales, por separado o conjuntamente—.

De cualquier de las formas, el panorama que describía era, sencillamente, tan demoledor como real. Tras toda una pléyade de datos y estadísticas, se advertía como,

«Siendo el paro el principal problema con el que se enfrenta nuestra sociedad, resulta extraordinariamente importante abordar la situación en la que se encuentra uno de los colectivos sobre el que incide con mayor intensidad: el de los jóvenes desempleados.

El paro juvenil adopta en un nuestro país características específicas en relación con el mismo [...]. Características que se concretan en su volumen y duración, lo cual agrava el problema aquí y ahora».

Se reconocía, además, como a pesar de la creación de cerca de 800.000 puestos de trabajo, debido a un “fortísimo crecimiento de la población activa” se daba la circunstancia de que se “mantengan en volúmenes similares las cifras de los que se encuentran parados”. El monótono argumento de la *culpabilización sui generis* del “baby boom” una vez más aparecería en tales escenarios⁵²⁵. En el terreno de las especificaciones se remarcaba como “1.370.000

número se publicaría un comunicado que desde la UGT se sacaría adelante el 12 de abril de 1988, ante determinadas declaraciones por parte de altos cargos de Economía y Trabajo –Guillermo de la Dehesa y Antonio García de Blas en concreto– quienes en días anteriores se habían prodigado en afirmaciones de todo tipo, al respecto de los salarios y otras referidas a las grandes oportunidades para encontrar trabajo: “UGT, contra la regresión social”, *Unión*, n° 102, (1988), p. 6.

⁵²⁴ AHFFLC, PSOE, “Medidas para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes”, Madrid, mayo 1988, sig. 001875-001. Documento localizado en el fondo de la Secretaria de Acción Sindical de UGT en un completo dossier al respecto.

⁵²⁵ Véanse los argumentos y datos manejados tiempo después –en concreto en 1990– en un recordado texto por uno de los principales responsables de aquel proyecto socialista, Álvaro Espina. Autor que entonces ocupaba la Secretaria de Estado de Empleo. En el mismo seguiría manteniendo las mismas hipótesis de trabajo de entonces, achacando a la *rigidez* pero también al «conjunto de instituciones de protección del empleo adulto» parte de la responsabilidad de la dramática situación por la que atravesaría la generación del *baby boom*. Aunque evitaría una defensa abierta del PEJ, no dudaría en afirmar: «Se trataría, por tanto, de desarrollar mediante la negociación colectiva la legislación sobre inserción laboral que ya está en vigor a través de la propia negociación colectiva, recuperando los aspectos más positivos del aprendizaje, durante el cual la formación se produce en y a través del propio trabajo». ESPINA, Álvaro, “El reto de la integración laboral de la generación del *Baby Boom*” en *Empleo, democracia y...*, *op.cit.*, pp. 215 y 213-214, respectivamente. Consúltese lo apuntado en la *nota* 488.

jóvenes no disponen en la actualidad de trabajo remunerado. Constituyen cerca de la mitad del total de nuestro desempleo [...] de cada dos parados hoy uno es joven”. De hecho, “el joven parado lo es más por no encontrar empleo que por haber perdido uno”. Resaltada esta circunstancia, se matizaba como “el 60% de los mismos (es decir, 825.000) aún no han encontrado su primer empleo”. O dicho de otra forma, los jóvenes eran uno de los colectivos que con mayor intensidad sufrían el paro de larga duración, lo que implicaba una “progresiva descapitalización profesional”. De igual forma, se afirmaba como “[e]ste círculo vicioso puede producir un desempleado, un desanimado o un necesitado de asistencia social de por vida”. Lo anterior, con una última característica: “la baja cualificación en el caso del paro juvenil”.

A partir de ahí, venía la valoración política oportuna y para ello nada mejor que enlazar con los objetivos marcados en el XXXI Congreso del PSOE en enero de 1988. Como se apuntó, el problema del desempleo juvenil se erigiría, en adelante, en su principal punto de acción política, al menos en el terreno de lo discursivo⁵²⁶.

Al mismo tiempo se volvería a remarcar la *retórica* de la necesidad de “sacrificios” por parte de todos los implicados. En primer término, “[e]l Gobierno debería evidenciar sus preferencias a favor de la política de empleo juvenil asignando a esta tarea importantes recursos presupuestarios”. No parecía, en cualquier caso, un sacrificio sobresaliente. En segundo lugar, la *retórica* –añadiríamos recalcitrante– liberal-flexibilizadora socialista se hacía más que patente cuando se indicaba en el segundo punto:

«Los sindicatos, deberían pedir a sus afiliados –y al resto de los trabajadores– que renunciaran a una parte de sus hipotéticas mejoras. A la vez que, deberían colaborar en la revisión de los impedimentos que ocasionados por fórmulas rígidas de contratación laboral pudieran dañar a los trabajadores actualmente en paro».

Y, en tercer lugar, más comedidos en cuanto al alcance de las peticiones se mostrarían con respecto a los empresarios, quienes “habrían que asumir incrementos en sus plantillas, con el objetivo de impedir –junto con el resto de los agentes sociales e instituciones públicas– que una generación se instale en la falta de oportunidades, en la desesperanza y en el escepticismo”.

Realizada tales valoraciones, parecía que, de nuevo, los trabajadores deberían volver a aportar un *granito más* a la causa compartida de la lucha contra el desempleo. Pero lo realmente trascendente de los 18 folios allí contenidos, es que tal texto buscaba convertirse en un “instrumento para el diálogo”, según se podía leer en el apartado “III. Líneas básicas de un posible contrato para la inserción de los jóvenes sin empleo”.

En lo que no dejaba de ser un singular *memorándum* para la futura elaboración de un Real Decreto o normativa laboral específica en su caso, se establecían el objetivo, naturaleza, características específicas, duración... y otras tantas circunstancias, del que se pretendía que se transformará en un contrato de “todos los jóvenes demandantes de primer empleo a través de su iniciación profesional y del aprendizaje de un empleo por la práctica en el trabajo”.

En relación a su naturaleza jurídica se advertía que se trataría de una “relación laboral de carácter especial”, a pesar que las razones jurídicas presentadas se mostrarán, más bien,

⁵²⁶ En cualquier caso, en el texto que estamos examinando se remarcaba: «En él los socialistas manifestamos que nuestro propósito consistía en lograr que tanto el Gobierno de España como los restantes interlocutores sociales posibilitaran en el que una parte significativa de los empleos, que de ahora en adelante, fueran creándose pudieran ser percibidos por uno de los colectivos que ha sufrido con mayor intensidad estos años de crisis: los jóvenes». AHFFLC, PSOE, “Medidas para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes”, Madrid, mayo 1988, sig. 001875-001. De sobresaliente interés también resulta acercarse al primer número de una revista que lanzaría el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que se publicaría entre 1988 a 1995. Nos referimos a *Economía y Sociología del Trabajo*. En el citado primer número dedicado a ‘Los jóvenes y el empleo’ véanse los argumentos mantenidos por buena parte de los representantes políticos y gubernamentales socialistas allí contenidos: CHAVES, Manuel, “La política de empleo e inserción profesional de los jóvenes: conferencia inaugural” (pp. 78-82); BENEGAS, José M^a, “El Partido Socialista y el empleo juvenil” (pp. 83-85); GARCÍA de BLAS, Antonio, “El problema del paro juvenil en España” (pp. 101-106).

débiles en sus bases legislativas, al relacionarla con el apartado g) del número 1 del artículo 2 del ET. Lógicamente se trataría de un contrato de “naturaleza temporal”. Las edades extremas comprendidas se situaban entre “los 16 a los 25 años”, y estaba destinado a jóvenes que hubieran “abandonado el sistema educativo y no haber tenido un empleo anterior o estarlo buscando más de 3 meses”.

Un contrato temporal juvenil cuya duración sería de “6 a 12 meses”, a “tiempo completo o a tiempo parcial”, y sin que el empresario adquiriera ningún tipo de obligación de mantener al trabajador contratado en plantilla una vez finalizado el mismo; pues como se anotaba, “el empresario podrá contratar a otro trabajador para la inserción profesional, aunque sea para ocupar el mismo puesto de trabajo”. Por otro lado, las condiciones que exigían al empleador no eran muy duras. Tan sólo, se hablaba de que para *aprovechar* tan magna forma contractual, tendría que darse, al menos, “un incremento adicional sobre la plantilla media de la empresa en los doce meses anteriores al momento de la contratación”⁵²⁷.

Donde realmente se podía intuir la ofensiva flexibilizadora radical –además de lo ya descrito, que por sí mismo suponía una profundización flexibilizadora de los contratos para la formación o en prácticas– era en el brutal abaratamiento del coste de mano de obra que se previa, hasta el punto de que los futuros jóvenes trabajadores cobrarían unas cantidades realmente bajas.

«La retribución será el Salario Mínimo Interprofesional corresponde a la edad del trabajador, en proporción a las horas trabajadas.

A los efectos de este contrato el SMI de los trabajadores de 16 años se igualará al de los 17 años»⁵²⁸.

También se reducía el posible *coste* de contratar a jóvenes, al prometerse el establecimiento de una “categoría específica” de cara a las cotizaciones de la Seguridad Social. Pero no sólo, pues se planteaban, además, toda una serie de “reducciones a la aportación empresarial de Seguridad Social”, así como una generosa “subvención, a tanto alzado, al empresario por cada trabajador contratado”. La *generosidad* de la administración no parecía tener límites: “Si durante la jornada el empresario imparte formación o enseñanza al trabajador contratado para la inserción, el INEM subvencionará el coste íntegro de la formación según los baremos previstos actualmente”.

Tampoco se establecían unos límites temporales de aplicación concretos. “Este programa tendría una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1990 siendo posible su ampliación temporal”. Y asimismo se eliminaba todo tipo de posibles restricciones u obstáculos legales: “Para ser contratado por esta modalidad de inserción el joven no tendrá la obligación de inscribirse en las Oficinas de Empleo”⁵²⁹.

En suma, allí estaba esbozada una propuesta que tiempo más tarde se convertiría en una realidad normativa, que cada vez se haría más omnipresente en el mercado de trabajo. El siempre mencionado *contrato basura* en su versión primitiva y radical, encontraba aquí su versión primigenia.

⁵²⁷ Asimismo se anotaba: «Igualmente, las empresas que, en los doce meses anteriores, hayan contratado para la formación o en prácticas a jóvenes con edades coincidentes con las establecidas para este tipo de contrato, deberán mantener contratados en el momento de celebrarse contratos para la inserción, al menos, al 75% de dichos trabajadores». AHFFLC, PSOE, “Medidas para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes”, Madrid, mayo 1988, sig. 001875-001, p. 15.

⁵²⁸ Véanse en el Capítulo 8 en el *anexo estadístico* la “Tabla 54. Evolución Salario Mínimo Interprofesional, 1982-1992 (mayores de edad)”. Para hacerse una idea aproximada en 1987 el SMI mensual era de 42.150 pesetas.

⁵²⁹ AHFFLC, PSOE, “Medidas para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes”, Madrid, mayo 1988, sig. 001875-001, pp. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, respectivamente.

El PSOE, y con él, el socialismo español, volvían a situarse a la cabeza de la “vanguardia” de la flexibilización liberal del mercado. Por más que se revistiera –como solía ser común, por otro lado– aquel documento como una llamada al *diálogo* más bien parecía, dadas las circunstancias descritas, si no una *provocación* –a falta de pruebas pero también de la necesaria documentación– sí, al menos, en una seria advertencia de que el PSOE –y lógicamente el Gobierno– no estaban por la labor de atender a las demandas sindicales de mayor estabilidad y de recuperación de derechos laborales y poder adquisitivo. Empezando por el mismo hecho de su omisión del fenómeno de la *precarización* laboral juvenil, que iba más allá de las propias realidades estadísticas-laborales.

Las reacciones no tardaron en producirse. Nos detendremos aquí, en exclusiva, en las de UGT. Antes de mayo de 1988, la UGT ya venía reclamando un *giro* en política laboral. *Escaldada* tras la negociación pero sobre todo los resultados del AES, y por consiguiente de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984, asumiría sus respectivas *corresponsabilidades* por el nacimiento de la cultura de la temporalidad.

Iniciado su particular *periodo de ratificación* a principios de junio de 1987, Nicolás Redondo escribiría con honda preocupación a Manuel Chaves. Un tiempo en el que, a buen seguro, ya obraba en el poder de UGT un documento interno elaborado desde el Ministerio de Económica y en concreto por Antonio García de Blas –entonces Subdirector de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos– que titulado “Las 27 medidas de Antonio García de Blas” avanzaba un duro paquete de medidas que, entre otras cuestiones, reducía notablemente la indemnización por despido⁵³⁰.

En este preciso contexto y ante los crecientes rumores que provenían tanto de Economía como desde la CEOE, acerca de nuevas y futuras reformas, el Secretario General de UGT le comunicaría al Ministro de Trabajo:

«Estimado compañero:

Según parece, porque no tenemos confirmación oficial al respecto, la CEOE ha solicitado –como parte de su ofensiva para extender la precarización del mundo del trabajo– que tales contratos [temporales a través del Real Decreto 1989/1984⁵³¹] sean prorrogados una vez agotado el término que la normativa permite.

En realidad, si se trae a colación el art. 15 del AES podrá verse que el apoyo a la modalidad de contratación explícitamente consignado surge de haber sido acordadas entre las partes.

Cualquier modificación unilateral de las mismas –y me refiero en participar al caso del Real Decreto 1989/1984– implicaría un claro y flagrante incumplimiento de lo convenido.

Pero, en cualquier caso, no son las cuestiones formales las más importantes sino precisamente las de fondo y en este sentido la prórroga unilateral de los contratos temporales sucesivamente renovados hasta el plazo de tres años implicaría una injusticia y un acto antisocial para que el que es difícil encontrar calificativo.

En este contexto resultaría paradójico e inexplicable que el país que tiene las normas de contratación más amplias de Europa –son palabras del presidente de CEOE– adopte una medida que frustrará las expectativas de miles de trabajadores que han esperado pacientemente adquirir la condición de fijos.

[...].

⁵³⁰ Información procedente de, CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, op.cit., p. 205, nota 5. Téngase presente que en aquel mismo año se publicaría el siguiente informe: OCDE, *Flexibilidad y mercado de trabajo: el debate actual. Informe técnico* Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987, cuyas recomendaciones recogería fielmente los técnicos de Economía. Véase *Presentación*, nota 44, nota 45, nota 46 y nota 48 y también en el presente apartado nota 558.

⁵³¹ Real Decreto 1989/1984, de 17 de octubre, *por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo* [B.O.E. 19 de noviembre de 1984]. Dicha normativa no sólo se convertiría en la principal figura de la RET’84, sino que también estaría directamente detrás de la aparición de la ‘cultura empresarial de la temporalidad’. Véase lo apuntado en la nota 132.

Cordialmente.

Nicolás Redondo».

La citada carta al señor Ministro de Trabajo, llegaba un año después de la celebración del XXXIV Congreso de la UGT. Desarrollado durante los días del 2 al 6 de abril de 1986, y bajo eslogan “Un sindicato para la nueva sociedad”, daría inicio la citada primera *etapa de rectificación* con autocritica incluida en las filas ugetistas⁵³². Un hecho no muy común entre las filas socialistas como hemos tenido la oportunidad de observar en más de uno y dos casos⁵³³.

A diferencia de lo que ocurría con las citas congresuales del Partido, en aquella coyuntura el mismo pasaría, prácticamente, desapercibido en el periódico de referencia de la familia socialista⁵³⁴. Ni un solo editorial se dedicaría al respecto. De hecho, en este caso concreto puede resultar a la vez más clarificador acercarse a las crónicas de los periódicos no afines al socialismo español⁵³⁵.

Superado el traumático referéndum de la OTAN de marzo de 1985⁵³⁶, y con la vista puesta en las elecciones de junio de 1986, se trataría de combinar una doble estrategia en el campo político antes que en el sindical: por un lado, cerrar filas dentro de la familia socialista⁵³⁷, a la par que no se cuestionaría el modelo Partido-Sindicato. Asimismo de allí saldría el apoyo de

⁵³² Véanse al respecto, AHFFLC, UGT, Secretaria General, “Informe de gestión de la Secretaria General al XXXIV Congreso”, Madrid, 1986, sig. 001635-004; y, en concreto, AHFFLC, Fondo Zufiaur, UGT, “Informe de gestión de la Secretaria de Acción Sindical Institucional”, Madrid, 1986, sig. 001635-007.

⁵³³ De cara a la celebración del propio Congreso Confederal ugetista, previamente, se cerraría cualquier posible divergencia en el V Comité Confederal ordinario de la UGT, celebrado los días 30 y 31 de enero de 1986. Todavía eran tiempos en que se remarcaba la *necesidad* de repensar y reelaborar –sin chocar en lo político así como en lo estratégico con el Partido como con el Gobierno– lo que se catalogaba aún como la *profundización del concepto de la modernidad*, que para el propio Redondo ha de «de recoger los principios de justicia social, democracia industrial e igualdad y garantías efectivas de los derechos sociales de los trabajadoras». UGT-CF, “Resolución del V Comité Confederal ordinario”, *Unión*, nº 80, (1986), pp. 3-5. Consúltase también aquí la teorización al respecto que plantearía por aquellas mismas fechas el propio, REDONDO, Nicolás, “Modernidad y progreso...”, *op.cit.*, pp. 5-16. Por lo demás, todavía eran tiempos en donde se mantenía una actitud no crítica acerca de los resultados del AES en materia de contratación temporal, por más que el citado acuerdo social se hubiera dado por finiquitado mucho tiempo antes. A modo de ejemplo: “La contratación temporal desde los Pactos de la Moncloa al AES. Una fórmula que, con garantías, puede servir de estímulo al empleo”, *Unión*, nº 80, (1986), p. 21.

⁵³⁴ En realidad se resaltarían los problemas internos antes que posibles divergencias con respecto a las cuestiones político-estratégicas en los días previos. Por ejemplo, Noticia, “Los expulsados de la UGT de Álava pedirán su reingreso en el congreso que se inicia hoy”, *El País*, 2 de abril de 1986. Otro reporte significativo, más aún teniendo en cuenta la cultura organizativa ugetista resultaría el siguiente: Noticia, Rodolfo Serrano, “Comenzó la batalla por la formación de la ejecutiva en el congreso de UGT”, *El País*, 5 de abril de 1986.

⁵³⁵ Eso sí, tampoco faltaría el *amarillismo* desinformador habitual. Un ejemplo, entre otros tantos: Portada, “Ya hay alternativa en el PSOE”, *ABC*, 4 de abril de 1986. En donde se podía leer: «El Congreso Confederal de UGT que estos días se celebra en Madrid ha venido a poner de manifiesto que ya existe alternativa en la dirección del PSOE. Nicolás Redondo ha desplazado a todos los políticos del aparato del partido y se ha convertido ante las bases socialistas en el segundo hombre indiscutible del PSOE». Léase asimismo: Editorial, “Nicolás Redondo”, *ABC*, 4 de abril de 1986.

⁵³⁶ Las siglas de la Organización del Tratado Atlántico Norte desaparecerían de la documentación de la UGT en adelante. Véase, Noticia, “Redondo presidirá una Ejecutiva muy acorde con sus tesis sindicales”, *ABC*, 4 de junio de 1986.

⁵³⁷ Noticia, “Nicolás Redondo, reelegido por unanimidad secretario general de la UGT”, *El País*, 7 de abril de 1986; y, Noticia, Luis Miguel del Barrio, “UGT cerrará filas con el PSOE para las próximas elecciones generales”, *ABC*, 7 de abril de 1986.

la central ugetista a la futura candidatura socialista de cara a las elecciones generales⁵³⁸, aunque también se dejaría sobradamente claro que el contexto político era diferente al de 1982, al negarse a participar en la Comisión encargada de la elaboración del programa electoral⁵³⁹ y emitir un simple “apoyo crítico” al mismo⁵⁴⁰. Pero, por otro lado, ya se marcarían las suficientes diferencias en el campo de la estrategia sindical, aunque nada hacía pensar lo que acontecería en poco tiempo. Pero ahí estaban, por más que no se dejará de insistir como el primer punto de la *agenda política* ugetista pasaba por “[p]roseguir y profundizar en la política de concertación constituye el elemento central de la estrategia de UGT”⁵⁴¹.

Las distancias, junto con las desconfianzas, empezaban a aparecer todavía a un nivel semi-público en un tablero de juego Partido-Sindicato que no tenía antecedentes⁵⁴². Cuando tampoco era imaginable la cercana “unidad de acción” con CCOO, con todo se podía observar – para cualquier lector atento – que el peso de defensa de la autonomía sindical estaba cobrando enteros a marchas aceleradas. Eran tiempos aún en donde predominarían las *buenas formas* en lo político y en lo escenográfico⁵⁴³. De “difícil equilibrio” que llegaría calificar aquel Congreso⁵⁴⁴.

Desde entonces, nada volvería a ser igual. Más aún tras lo que acontecería en octubre de 1987. A partir de ese mismo momento, desde la UGT saldría *al trapo* de todas y cada una de las iniciativas flexibilizadoras vinieran del Gobierno, de la CEOE o de otros centros de poder como el Círculo de Empresarios⁵⁴⁵.

⁵³⁸ Véase: Noticia, Rodolfo Serrano, “El congreso de UGT aprueba por unanimidad la gestión de Nicolás Redondo”, *El País*, 4 de abril de 1986; y, “Una decisión oportuna. Elecciones generales de junio”, *Unión*, nº 82, (1986), p. 21.

⁵³⁹ Noticia, “UGT rechaza participar en el programa electoral socialista”, *El País*, 7 de abril de 1986.

⁵⁴⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “El sindicato no ha querido participar en los borradores del programa electoral del PSOE”, *El País*, 7 de abril de 1986.

⁵⁴¹ “Resumen de resoluciones”, *Unión*, nº 82, (1986), p. 10.

⁵⁴² Véase, al respecto, AHFFLC, UGT, Secretaria General, “Informe de gestión presentado por el Secretario General al XXXIV Congreso”, Madrid, 2-6 de abril 1986, sig. 001635-007.

⁵⁴³ Noticia, Rodolfo Serrano, “Un cambio de relaciones”, *El País*, 4 de abril de 1986. En aquella crónica se remarcaría uno de los postulados que Redondo en nombre de la UGT defendería con mayor ahínco: convertir al sindicato socialista en una organización de masas. O dicho en otras palabras: «[A]brir a la organización hacia otros trabajadores que pueden tener opciones políticas distintas a la socialista». Un aviso, en términos diplomáticos, de que no se descartaba en un plazo temporal corto, revisar la estrategia de ‘correa de transmisión’ seguida hasta entonces.

⁵⁴⁴ Noticia, “UGT intenta un difícil equilibrio en sus relaciones con el PSOE y el Gobierno”, *ABC*, 3 de abril de 1986.

⁵⁴⁵ También en 1987 el Gabinete Técnico Confederal prepararía una extensa respuesta a un documento de trabajo del Círculo de Empresarios, en que el que se apostaba por una mayor flexibilización del mercado laboral, a través – ¡cómo no! – de nuevas y mayores reformas laborales. Allí la UGT defendería su nueva concepción contra tales propuestas: «Entrando en el análisis de las medidas expuestas para lograr el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo, en opinión del Círculo de Empresarios, destaca la idea de que esta mayor flexibilidad del mercado de trabajo sea imprescindible para lograr una mayor flexibilidad del conjunto de los mercados. No se entiende fácilmente que un conjunto de medidas dirigidas a tan sólo uno de los mercados de la economía tenga la suficiente entidad como para dinamizar toda la economía y resolver los problemas de la competitividad. Más bien habría que pensar que únicamente multitud de acciones en el conjunto de los mercados tendría un carácter interdependiente y generarían las interacciones necesarias para elevar el nivel de adaptabilidad de la economía». AHFFLC, UGT-Gabinete Técnico Confederal, “Análisis crítico del documento del Círculo de Empresarios. «La flexibilidad en el mercado de trabajo y la internacionalización de la economía española»”, Madrid, mayo 1987, sig. AI 325. Véase, por lo demás, Noticia, “Los empresarios urgen normas para abaratar el despido”, *El País*, 6 de mayo de 1987.

En este mismo contexto, el *instrumento de diálogo* propuesto por el PSOE, sería tajantemente rechazado por la UGT. Rechazado y contestado. No sólo desde la CEC de UGT⁵⁴⁶, sino es que además se redactaría un largo informe en contestación al proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Un contundente informe que bajo el título, “Comentarios sucintos a la medida para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes propuestas por el PSOE”, fechado un 26 de mayo de 1988⁵⁴⁷, se transformaría, a la postre, en uno de los primeros documentos de trabajo en el que, uno a uno, se cuestionaría tanto la política laboral socialista así como el conjunto de su política económica y laboral.

«La propuesta del PSOE de una nueva modalidad de contrato en precario particularmente destinada a determinados jóvenes de menos de 26 años encierra tales convulsiones en lo económico y en lo jurídico que ha merecido un sereno análisis por parte de la UGT».

Así se *despachaba* el primer párrafo. Tras recordar las altas tasas de contratación temporal, y cómo las mismas habían producido un “volumen muy peligroso para la consecución de una sociedad solidaria y vertebrada”, se recordaba, además, como tal proyecto “encierra un cambio en el modelo de relaciones laborales [...] que desembocó en su tiempo en el Estatuto de los Trabajadores”.

Con autocrítica –ahora sí– incluida por delante a lo que se *factó* en su día, la radical oposición a una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, junto con la demostración de sus efectos perversos, conduciría a la UGT a expresar lo siguiente:

«Suced, además, que la nueva medida se propone en un momento en que las medidas de flexibilidad de entrada al mercado de trabajo, que en su día apoyamos, están mostrándose incapaces (cuando no contraproducentes) para hacer que los altos niveles de crecimiento económico optimicen la creación de empleo. Las medidas y los nuevos contratos que se mostraron útiles para frenar la destrucción de empleo en una época de crisis, pudieran tener perversos efectos minimizadores y sustitutorios de empleo fijo por precario en una economía creciendo entre el 5 y el 6%».

Lo que a continuación sigue es un análisis, punto por punto, que subraya todas y cada uno de los problemas y obstáculos que podrían llegar a suponer la marcha de aquel proyecto normativo de empleo juvenil. Con una nota característica relevante: una muy dura posición tanto en las formas como en el contenido. Después de calificar al futuro contrato de “hipersubvencionado”, se recordaba como “[n]o existe justificación alguna para pretender calificar el contrato de inserción como relación laboral de carácter especial”. A lo que se acompañaba de un análisis jurídico, incluidas la jurisprudencia más actualizada. Todavía más, pues, “[p]retender vincular un colectivo de trabajadores sujetos a contratos de inserción con una relación laboral de carácter especial supone un flagrante vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución”.

En el terreno de las posibles consecuencias, para la UGT el mismo conllevaría, a buen seguro, no pocos “efectos de expulsión del mercado de trabajo a dos niveles”. Primero, se incidía como en caso de poner en marcha el mismo, “la práctica totalidad de los parados con 26 años o más, con cualificación media o baja, no tendrá ni la menor posibilidad de encontrar un

⁵⁴⁶ Véase, AHFFLC, UGT-CEC, “Comunicado de la C.E.C. Medidas para la inserción laboral y empleo de los jóvenes”, Madrid, mayo de 1988, sig. 001875-001. Un comunicado en donde destacaban dos argumentos. Primero: «Por ello es realmente impropio que desde la Ejecutiva Federal del PSOE se formulen propuestas cuyos beneficiarios reales no serán los jóvenes ni el empleo sino los sectores más conservadores del empresario alejados de toda la preocupación por el desempleo». Y segundo, a pesar de todo, se concluía: «Reiterándonos, así, en nuestra voluntad de negociación con el Gobierno y en la disposición de asistir a la convocatoria anunciada por el propio Presidente».

⁵⁴⁷ AHFFLC, UGT, “Comentarios sucintos a la medida para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes propuestas por el PSOE”, Madrid, 26 de mayo de 1988, sig. 001875-001.

puesto de trabajo”. Y segundo, “la medida discrimina entre los propios jóvenes ya que ningún joven con baja cualificación que haya trabajado tres meses, por ejemplo a los 18 años, podrá volver a ser contratado hasta los 25 [...] ya que al no poder acogerse a la medida resultará mucho más caro para cualquier empresa”. El posible camino para este sector bajo estas circunstancias, se visualizaba de forma meridiana: “Ni que decir tiene que la salida de estos nuevos marginados sólo podrá ser la economía sumergida y la sobreexplotación”. Por sí lo anterior fuera poco, se advertía de cómo se perderían los contratos de formación, que, ciertamente, habían dado resultados desiguales⁵⁴⁸.

Ya en la última parte del mencionado informe de 16 folios se matizaban como los requisitos exigidos al empresario de que “el contrato suponga un incremento de plantilla, es más aparente que real”, más teniendo presente el contexto de crecimiento económico. Tampoco se visualizaba ningún tipo de avance en la posible modificación del “artículo 16 del ET según el cual «los empresarios están obligados a solicitar de las Oficinas de Empleo los trabajadores que necesiten»”. La posible modificación del articulado básico de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, perseguía un fin no explícito: “Consideramos que esta medida lo único que persigue es la disminución ficticia del paro registrado al suprimirse la obligación de inscripción en la Oficina de Empleo”⁵⁴⁹. No sólo, ya que la “implantación del «silencio administrativo positivo» propiciará, además, la extensión de los abusos en la concesión de las subvenciones”. El cuestionamiento de las funciones propias del INEM quedaba entredicho. Por sí faltaban motivos para la preocupación se indicaba, por último, como “al existir la posibilidad de contrato a tiempo parcial existe el peligro de compatibilidad de este tipo de contrato con otros de formación”, y a partir se podría *consagrar* “así la práctica fraudulenta de pagar solo el tiempo parcial y cobrar subvención para contrato de formación”.

La conclusión era evidente: “el rechazo enérgico de nuestra organización”. Remarcadas las posibles “consecuencias sociales negativas brutales incluso para buena parte del objetivo enfocado que son los jóvenes”, UGT defendía la necesidad de discutir su propuesta de las *170 medidas*. Por un compromiso por el empleo”, cuya primera versión había salido a la luz a principios de marzo 1988⁵⁵⁰.

Visto con la suficiente perspectiva, el último citado documento supondría un antes y un después, y como bien ha indicado Rubén Vega se transformaría en el “programa del «giro social»”⁵⁵¹. Las *170 medidas* con las que UGT quería recuperar la iniciativa política, a la par

⁵⁴⁸ En concreto se hacía mención expresa al Real Decreto 1992/1984, de 31 de octubre, *por el que se regulan los contratos en prácticas y para la formación* [B.O.E. 9 de noviembre de 1984]. Véase, por lo demás, lo apuntado en la *nota 429*.

⁵⁴⁹ Consúltase lo apuntado en su momento en el apartado “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

⁵⁵⁰ El programa resumido puede localizarse en, *Unión*, n° 101, (1988), pp. 3-5. Y de forma extensa en, AHFFLC, UGT, “Reflexiones de UGT para un compromiso de progreso por el empleo”, Madrid, 1988, sig. 001874. Asimismo véase el *informe de gestión* que presentaría la Secretaria General de UGT en abril de 1988, un mes de aprobarse aquella guía programática. En el mismo tras repasar las cuatro cartas que se habían enviado al Gobierno de cara a abrir un posible diálogo social –17 de diciembre de 1987, 18 de febrero, 14 de marzo y 9 de marzo de 1988– y recordar como las mismas «no han merecido contestación ni acuse de recibo»; se indicaba al respecto de las propias propuestas presentadas: «Se trata de un trabajo importante, en el que ha tenido destacada actividad el gabinete técnico y que es necesario debatir y enriquecer en el seno del sindicato en cuanto no está pensado sólo como aportación testimonial sino que debe ser una base fundamental para la acción sindical». Medidas, en suma, que buscaban un ‘giro social’ previa defensa de la autonomía sindical, y recordando: «[no] se recibe de buen talante que mantengamos posiciones sindicales que son normales en cualquier sindicato europeo y estamos pagando un duro precio por mantener nuestra autonomía». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta al IV Comité Confederal ordinario”, Madrid, 22 y 23 de abril de 1988, sig.ant. B/53/35, pp. 14, 15, 16 y 30, respectivamente.

⁵⁵¹ VEGA, Rubén, *La reconstrucción del..., op.cit.*, p. 250.

que la credibilidad de que seguía siendo un sindicato combativo, también perseguiría evidenciar que, en adelante, la central socialista estaba dispuesta a enfrentarse a la política económica y social del Ejecutivo. Así, el mismo sería presentado en todas y cada una de las ocasiones en que tendría oportunidad el propio sindicato. En realidad, buena parte de las anteriores respuestas tanto al Gobierno como a la CEOE o al Círculo de Empresarios, provenían de esa misma posición de partida.

Reconocimiento previo de corresponsabilidad por la situación laboral generada –antes que cualquier tipo de severa autocrítica– presentaba una dura crítica al discurso socialista y al relato dominante por extensión –“En ese contexto es en el que merece todo tipo de rechazo una triple dicotomía que se ofrece frecuentemente a los trabajadores para resolver el problema social del paro”–. Asimismo se realizaba un profundo análisis que iba desde la situación del desempleo, pasando por el mercado de trabajo y los problemas de la flexibilidad, junto con las denuncias y abusos precarizadores, para concluir en la presentación de su *paquete programático* en donde no deja cuestión por abordar. En suma, allí estaba contenida una *vuelta* al programa laboral socialdemócrata tradicional ugetista.

«La actual situación favorable de nuestra economía obliga al replanteamiento de las medidas coyunturales que en su día apoyábamos por la simple lógica de que las condiciones que justificaron su aceptación no sólo han cambiado, sino que cualitativamente han mejorado mientras que por parte del Gobierno jamás se ha hecho un ajuste beneficioso por los trabajadores en función de la coyuntura económica favorable»⁵⁵².

En buena medida, el punto de origen y de conclusión de la denuncia del sindicato socialista, sería la negativa a seguir apoyando cualquier tipo de modificación laboral que conllevará mayor flexibilidad:

«En conclusión, el grado de flexibilidad alcanzado respecto de los contratos regulados es tal que consideremos plenamente agotada la posibilidad de añadir nuevos tipos, al mismo tiempo consideramos necesario, tanto su correcta utilización, como el replanteamiento de la existencia de que aquellos que no han obtenido los resultados previstos».

Tras una impresionante maraña de datos conocidos y no tan conocidos, en el quinto y último apartado se dedicaba a “Juventud y empleo”. De entrada, y tras recoger unas conocidas palabras de Olof Palme⁵⁵³, se advertía como “[t]rasladar esta reflexión a la situación por la que atraviesan los jóvenes en nuestro país puede, y debe, levantar muchas ampollas, y evidencia la necesidad del replanteamiento de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno en materia de política de empleo”.

El panorama a nivel estadístico no se diferenciaba en mucho del proyecto presentado por el propio Gobierno en mayo de 1988, pero, claro está, se apuntaban algunas nuevas notas: “La transición a la vida adulta es para los jóvenes de ahora mucho más dura que antes. Y esta injusticia social, que en ocasiones raya en la crueldad, deriva en que estos jóvenes se conviertan en mano de obra barata”. Concluyendo: “[se] les ha convertido en un ejército de reserva para la economía sumergida”.

El planteo de UGT con tal texto –que en el tiempo precedía a la propuesta del PSOE en materia de empleo juvenil– terminaba exigiendo un mayor control de las contrataciones de

⁵⁵² Un párrafo antes se remarcaba lo que, a buen seguro, sería una de las mayores autocríticas realizadas por UGT en este tiempo: «Desde esa perspectiva realista responsable, nuestro sindicato acepto las distintas modalidades de contratación y por tanto una cierta flexibilidad de entrada al mercado de trabajo, como exigencia para una mejor distribución del escaso mercado laboral y como paso intermedio obligado hacia la consecución de la estabilidad del empleo». AHFFLC, UGT, “Reflexiones de UGT para un compromiso de progreso por el empleo”, Madrid, 1988, sig. 001874, p. 29.

⁵⁵³ «Me han dicho que, en ciertas partes de las viejas ciudades industriales inglesas, una mayoría de los jóvenes está en paro. En mi opinión, las políticas que han conducido a tales resultados han sufrido una derrota total, tanto económica como moralmente». AHFFLC, UGT, “Reflexiones de UGT para un compromiso de progreso por el empleo”, Madrid, 1988, sig. 001874, p. 134.

fomento del empleo para los jóvenes, denunciando también los elevados niveles de fraude. Medidas, de nuevo, moderadas acompañadas de otras tantas como pudiera ser las de potenciar la estabilidad y formación del empleo juvenil. Por cierto, ni una sola medida se recogería por parte del PSOE un mes después⁵⁵⁴.

A partir de entonces, la lucha contra la *precarización del empleo* pasaría a convertirse en una de las principales batallas ugetistas cuando no en la principal. Incluso antes del final del verano, se *lanzaría* otro categórico documento que titulado justamente, “La precarización no crea empleo”, se constituiría en la fiel demostración de la principal debilidad del *boom económico* del periodo socialista⁵⁵⁵. A partir de los propios datos proporcionados por la nueva metodología de la EPA desde el segundo trimestre de 1987, se atacaba duramente la enorme flexibilidad alcanzada dentro del mercado laboral español. La conclusión, una vez más, era obvia: “la política de precarización no permite la creación de empleo en los términos que la sociedad demanda como consecuencia de sus pautas demográficas y sociales, que ya la UGT cifró en 500.000 empleos anuales en un plazo de diez años”.

Lo relevante, en la práctica, era la verificación del nacimiento de lo que aquí hemos denominado como la “cultura de la temporalidad” con todos sus efectos negativos *ad hoc*. “En términos absolutos, en tan sólo nueve meses se han perdido 197.600 empleos estables, los cuales han sido sustituidos en su totalidad por contratación temporal”. Pero más allá de cifras, las consecuencias dentro de la propia fisionomía del mercado de trabajo aparecían ya meridianamente claras. Consecuencias tanto laborales –empezando por el proceso de segmentación y dualización dentro del mercado de trabajo entre *insiders* y *outsiders*⁵⁵⁶– pero también de otro tipo que afectaban a la propia labor sindical.

«Este proceso pone de manifiesto la fragmentación acelerada de nuestro mercado de trabajo, con nefastas consecuencias de orden social sobre los trabajadores contratados en precario, generando, al mismo tiempo, un agudo corporativismo dentro del mercado y dañando gravemente la productividad del factor de trabajo».

Datos y evidencias que fundamentaría la llamada al *giro social* por parte de la UGT en compañía de CCOO. Desaparecida entonces ya la siempre *ligera autocrítica* que acompañaría en una primera fase al “periodo de rectificación”⁵⁵⁷, se hablaría del “fracaso de la política de empleo, que minimiza el potencial de creación del mismo y condena a los trabajadores a un proceso de precarización”. *Precarización* que se había transformado en “un mecanismo de sustitución y no de creación de empleo”. Una *voz de alarma* que se producía en plena *ofensiva liberal*. Baste recordar, por ejemplo, como por aquellas mismas fechas la OCDE publicaría el conocido “Informe Dahendorf”, en donde se advertía de la imperiosa necesidad de eliminar cualquier tipo de *obstáculo* –léase *rigidez*– que perturbara el natural funcionamiento del mercado de trabajo. Un *informe* no pocas veces citado, y que encargado al prestigioso sociólogo liberal británico fundamentaría la estructura básica de las políticas laborales de los países occidentales en los siguientes años⁵⁵⁸.

⁵⁵⁴ AHFFLC, UGT, “Reflexiones de UGT para un compromiso de progreso por el empleo”, Madrid, 1988, sig. 001874, pp. 14, 28, 34, 134, 136 y 151, respectivamente.

⁵⁵⁵ AHFFLC, UGT, “La precarización no crea empleo”, Madrid, junio 1988, sig. 001875-001.

⁵⁵⁶ Véase Capítulo 2, *nota 135*, *nota 136* y *nota 137*.

⁵⁵⁷ «En consecuencia, si los empresarios no hubieran tenido las facilidades y bonificaciones que conlleva la contratación temporal aplicable a cualquier puesto de trabajo, ya sea de naturaleza temporal o no, hubieran tenido que contratar empleo estable para poder hacer frente a las fuertes presiones de la demanda de 1985-87, liberándose recursos que el sector público podía haber destinado a inversiones productivas generadoras de empleo». AHFFLC, UGT, “La precarización no crea empleo”, Madrid, junio 1988, sig. 001875-001, p. 4.

⁵⁵⁸ OCDE, *Flexibilidad y mercado...*, *op.cit.*. Del mismo saldría la definición liberal de flexibilidad más extendida: «[E]s la capacidad de los individuos en la economía y en particular en el mercado de trabajo de renunciar a sus costumbres y de adaptarse a nuevas circunstancias». Tesis que serían

Con las mismas el fenómeno precarizador se había transformado en un ataque directo a la clase trabajadora: “existe otra gran ventaja, aunque inconfesable” se exponía, pues, “en la utilización de los contratación temporales por parte de las empresas: desplaza la relación de fuerzas en la empresa a favor del empresario y en contra del trabajador”. Cuestionada tanto la política laboral como la económica, no obstante, en aquel periodo de crecimiento había que buscar soluciones para terminar con alto volumen de desempleo: “¿si no lo hacemos ahora, cuando tenemos un crecimiento intenso y sostenido, cuándo lo vamos a hacer?”.

Sin embargo, lo que resultaba intolerable, desde la perspectiva sindical, era que tanto en tiempos de crisis como de bonanza, se continuaría con los mismos argumentos y contra-argumentos, siempre a favor de la racionalidad económica, pero ante todo a la hora de explicar que “debido al aumento de la población activa, los aumentos de empleo no reducirán prácticamente durante unos años, el volumen de desempleo”. Así pues, “[e]stas afirmaciones no son admisibles desde una perspectiva de progreso”. Había llegado el momento de “dar un giro en la acción de Gobierno”. Un *giro* que, más pronto o más tarde, chocaría con la *obsesión antinflacionista* por parte del Ejecutivo⁵⁵⁹. Y, por ahí, esencialmente, vendría el origen de una confrontación que, en todo caso, a fines de junio de 1988 no hacía pronosticar el escenario en el que unos meses después desembocaría el 14-D.

No hubo negociación posible tras la respuesta de la UGT al documento de mayo de 1988 del Partido. Y pese a todo, y en un repetido como conocido gesto, el jueves 9 de junio Felipe González se entrevistaría con Nicolás Redondo para reabrir los puentes de diálogo e inclusive hablar de la posibilidad de iniciar un *giro social*. Al menos así se creyó por parte de la UGT⁵⁶⁰.

Tan fructífera sería la reunión que se abrirían los canales de diálogo, y se llegaría a establecer un calendario de negociaciones para la segunda quincena del mes de junio⁵⁶¹. Pero todavía más, pues, el propio Presidente se comprometería en guardar en el cajón la propuesta del PSOE, y abrir un posible marco de negociación a partir de las *170 medidas* propuestas por la central socialista⁵⁶². Propuesta programática que se había aprobado definitivamente en el IV Comité Confederal ordinario celebrado unos días antes de la presentación por parte del Ejecutivo de su propuesta de empleo juvenil⁵⁶³.

refrendadas de inmediato en, id., *Perspectivas del empleo*, 1987, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987. Véase aquí también un adelanto en, id., *Estudios económicos de la OCDE. España, mayo 1986*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1986. Por lo demás, en primer lugar, consúltese el informe de la OIT firmado por, SARFATI, Hedva y KOBRIN, Catherine *La flexibilidad del mercado de trabajo: antología comparada*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992; y en segundo término, las valoraciones críticas ofrecidas por, CACHÓN, Lorenzo, “La contratación temporal en España: mercado de trabajo y prácticas empresariales” en *El reto del empleo*. Dossier monográfico, *Ekonómiaz: Revista vasca de economía*, nº 31-32, (1995), pp. 208-235.

⁵⁵⁹ AHFFLC, UGT, “La precarización no crea empleo”, Madrid, junio 1988, sig. 001875-001, p. 1, 2 3, 5 y 7, respectivamente.

⁵⁶⁰ De interés resulta acercarse al número 103 (1988) de *Unión*. Parecería entonces que se volvían a los *viejos-recientes* tiempos del diálogo y la concertación. De hecho, sea abriría aquel número con una fotografía de Redondo y González en un mismo sillón y acompañados de números de dirigentes ugetistas y de miembros del Ejecutivo.

⁵⁶¹ Véase la descripción que hace de la misma, ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del socialismo...*, op.cit., pp. 350-351 y nota 199. Recalcando finalmente: «[E]l Gobierno no accedió finalmente a las peticiones de los sindicatos en las mesas abiertas durante el verano de 1988».

⁵⁶² Noticia, “El diálogo entre UGT y el Gobierno se ha abierto, según Redondo”, *El País*, 10 de junio de 1988.

⁵⁶³ AHFFLC, UGT-CEC, “Informe de gestión que presenta la Comisión Ejecutiva Confederal al IV Comité Confederal ordinario: Madrid, 22 y 23 de abril de 1988”, Madrid, sig.ant. B/53/35. La resolución del mismo puede leerse en: “Resolución del IV Comité Confederal ordinario”, *Unión*, nº 103, (1988), pp. 8-9. En el mismo, no sólo se aprobaría el proyecto programático de las *170 Medidas* sino que se iniciaría

Poco tiempo duraron las esperanzas. Así aquella ronda de diálogo se dejaría para el inicio del nuevo curso político, tras las fallidas reuniones de julio⁵⁶⁴. Y ya en septiembre desde el Gobierno se iría cerrando todas las mesas y denegando las peticiones sindicales⁵⁶⁵.

Se avecinaba, por tanto, un *otoño caliente*. En pocos meses de un conflicto de matiz salarial se pasaría, primero, a uno *laboral* para transformarse, finalmente, en un gran conflicto social y de clase⁵⁶⁶. En esta escalada, mucho contribuirían tanto el Gobierno como el PSOE, ante su obstinación, primero, en negar cualquier posible cambio en su política económica liberal, y segundo, en negarse a cualquier posible diálogo con las dos principales fuerzas sindicales, constituidas, en la práctica, en la principal fuente de oposición política tras los resultados de las elecciones generales de 1986.

En no pocas ocasiones se ha especulado que los sindicatos tenían preparada la convocatoria de una huelga general desde antes del verano. Interpretaciones siempre desde una perspectiva liberal, que no han sustentado sus afirmaciones en datos ni en documentos, y que a su vez han vinculado el denominado “pago de la deuda social” tras el 14-D con la crisis económica de los primeros años noventa. Tampoco, por este último lado, se ha aportado prueba alguna⁵⁶⁷. Dicho esto, nos preguntamos: ¿incluso de ser cierta esta hipótesis cambiaría sustancialmente la posible interpretación histórica de las razones que sustentaron la convocatoria del 14-D así como sus posteriores consecuencias? No creemos que sea así, siempre y cuando no se pretenda llevar a cabo un tipo de *lectura* de aquellos hechos, que, a su vez, busque la clásica culpabilización de los salarios y del gasto social, como los elementos determinantes de la crisis del modelo capitalista español en las fechas en que nos movemos.

Asimismo ha sido común calificar la estrategia sindical –en tono de abierta sospecha cuando no de directa culpabilización– de *insiders*. Es decir, de preocuparse a la hora de exponer sus reivindicaciones a favor de los trabajadores fijos y protegidos⁵⁶⁸. Otra hipótesis tan débil de sostener como evidencian el mismo desarrollo de los acontecimientos⁵⁶⁹.

una nueva campaña de UGT contra la precarización laboral: “La precarización no está creando empleo. Campaña de UGT contra la precarización en el empleo”, *Unión*, nº 103, (1988), p. 107, y cuyos eslóganes eran: «Creación de empleo»; «Estabilidad en el puesto de trabajo»; «Consecución de un compromiso de progreso por el empleo».

⁵⁶⁴ Véase el *informe* que se redactaría desde UGT y en el que se recogería, a grandes trazos, el desarrollo de las reuniones del 8 y 12 de julio con respecto a una posible reforma del INEM y la ampliación de la cobertura del desempleados: “«Se inicia el diálogo social». Con las mesas sobre cobertura y la reforma del INEM”, *Unión*, nº 103, (1988), pp. 5-7. También se hablaría en aquella ocasión de la búsqueda del «verdadero talante y que será el auténtico termómetro político que servirá para observar el grado de cumplimiento de ese cambio que la sociedad demanda».

⁵⁶⁵ ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del socialismo...*, *op.cit.*, p. 352 y en concreto la *nota* 206.

⁵⁶⁶ Para el desarrollo de estos acontecimientos, además de las citadas tesis doctorales de Javier Astudillo –*Los recursos del socialismo*– y de Emma Cerviño –*Políticas de representación sindical*– véase un relato ordenado de los hechos en, OLIET PALÁ, Alberto, “La «desavenencia que culminó en la huelga general del 14 de diciembre de 1998» en *La concertación social en...*, *op.cit.*, pp. 264-290. A sumarse a lo apuntado en la *nota* 475.

⁵⁶⁷ En realidad esta ha sido la interpretación más extendida. Por ejemplo Mariano Guindal escribiría: «A la vuelta del verano de 1988 Felipe González empezó a acariciar seriamente la posibilidad de no presentarse a las siguientes elecciones generales [...]. En esas fechas aún no se sabía que CCOO y UGT preparaban una huelga general. El gobierno se había encerrado en su mundo y había puesto un cartel: ‘Por favor, no molesten, estamos haciendo la democracia’». GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, p. 308.

⁵⁶⁸ Inclusive un autor tan poco sospechoso como es Javier Astudillo de defender tesis pro-sindicales –cuyo punto de partida analítico se reduce, primero, a interpretar el accionar sindical en función de la lógica electoral, y, en segundo término, en función de los intereses particulares de sus afiliados, siempre en referencia al caso de la UGT– reconocería como a partir de la ruptura de la familia

Lo único cierto, es que a la vuelta del periodo estival tanto UGT a CCOO se les negaría, inclusive, la audiencia⁵⁷⁰. Saturados después de tantos años de la frustrante experiencia de las aperturas y cierres de las mesas, habían constatado sobradamente que se podía dialogar siempre y cuando no se cuestionará el rumbo ni el contenido de la política económica. En tal situación, lo predecible se transformaría en realidad: un incremento de la conflictividad laboral, única vía efectiva para alcanzar reivindicaciones, o, al menos, frenar la *ofensiva liberal* gubernamental.

Otra vez la cuestión que desataría un nuevo ciclo de conflictividad sería la negociación de los PGE para 1989. Empeñado, por enésima ocasión, el Gobierno en su política anti-inflacionista, y convencido de sus beneficiosos efectos económicos no perdería la ocasión para reivindicar el carácter social de los citados *Presupuestos Generales del Estado*. Valoración que no compartían las fuerzas sindicales. Su capacidad de suscitar la unanimidad opositora, tan sólo tenía una excepción: el siempre fiel apoyo de la CEOE.

Es en este mismo contexto ya descrito, cuando desde la UGT se trataría de no *romper totalmente*, en un primer instante. Las viejas reminiscencias sobre la capacidad de aguante y paciencia parecían resurgir por más que se hubiera constatado la *ruptura* de la familia socialista. Pero también era la prueba de que la central socialista no dejaba de ser un sindicato negociador

socialista en octubre de 1987 y más tarde con convocatoria del 14-D, la UGT modificaría radicalmente sus tradicionales postulados programáticos y políticos. En un apartado de su tesis doctoral titulado “2.2.2.4. ¿En interés exclusivo de los «insiders»?” terminaría su balance de la siguiente forma: «En conclusión, la interpretación de que UGT y CCOO se preocupan de defender a sus afiliados (o, mejor dicho, a sus votantes) puede que explique su insistencia en conseguir incrementos del salario real en la negociación colectiva. Pero no se acaba de entender por qué además presionaron por conseguirán incremento del gasto social, esto es, conseguir bienes públicos. Si es verdad que los sindicatos españoles son tan pequeños como sus cifras de afiliación sugieren, siguiendo la lógica olsoniana éstos no habrían tenido incentivos racionales para emprender unas acciones de presión de cuyos resultados sus afiliados de base no se beneficiarían en exclusiva. Mucho menos se explica aun que presionasen por conseguir rentas para grupos sociales entre los cuales tenían pocos afiliados. Parece claro que además en España la representatividad de los sindicatos se mide por los resultados de las elecciones a comités de empresa y delegados de personal, y no por la tasa de afiliación, por lo que su representatividad es mayor de lo que las cifras de afiliación socialista indican. Pero tampoco parece que la actuación del sindicato socialista se puede reducir a lo que hacían sus delegados en los comités de empresa, y que por tanto la UGT no hiciese sino defender exclusivamente a los trabajadores que votan para dichos comités. La dirección ugetista quiso así, junto a un incremento de salario real de sus votantes, aumentar igualmente el gasto social destinado a las rentas de otros grupos sociales». ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, op.cit., p. 359-360. En esta línea véase también los argumentos que expondría, CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, op.cit., cuando se preguntaría: «¿Por qué la temporalidad dejó de ser un coste asumible para ambas organizaciones?» (p. 203). Entre otras hipótesis de trabajo plantearía las siguientes: «A partir de 1989 la estabilidad en el empleo se convirtió en el primer objetivo sindical. De esta forma los sindicatos estaban incorporando entre sus reivindicaciones la defensa de los trabajadores temporales ya que el deseo de la mayor parte de estos trabajadores era tener un empleo estable. Ahora bien, lo que llama la atención es que los sindicatos decidieran defender los intereses de unos trabajadores cuyo respaldo a los sindicatos era mínimo». Ibídem, pp. 217-218.

⁵⁶⁹ Aclaratorio, en extremo, es de nuevo el trabajo de, GARCÍA de POLAVIEJA, Javier, *Estables y precarios...*, op.cit.. La contravisión vendría de la mano de, BOIX, Carles, *Partidos políticos, crecimiento...*, op.cit., entre otros autores.

⁵⁷⁰ Noticia, José Antonio Carrizosa, “CCOO convoca movilizaciones para exigir la aplicación de la revisión salarial”, *El País*, 25 de octubre de 1988. Sobre la falta de contestación a las peticiones de reuniones para iniciar cualquier tipo de negociación, Noticia, Carmen Parra, “Redondo está seguro de que los problemas con el PSOE acabarán cuando el partido deba pedir apoyo electoral”, *El País*, 23 de octubre de 1988. Muy significativo, por lo demás, de por donde transcurría la ruptura de aquellas negociaciones serían dos artículos publicados por José María Zufiaur en *El País* a la vuelta de las vacaciones de verano. Allí hablaría de la *desconcertación* así como de el *desconcierto* para referirse al inmovilismo del Gobierno con respecto a un posible pacto social. ZUFIAUR, José M^a, “La desconcertación (1)”, *El País*, 8 de septiembre de 1988; ZUFIAUR, José M^a, “Y el desconcierto (y 2)”, *El País*, 9 de septiembre de 1988.

antes que movilizador. Así pues la dirección de la Unión General de Trabajadores trasladaría sus valoraciones y peticiones acerca del contenido de los PGE tanto al PSOE como al Grupo Parlamentario Socialista.

Nos situamos ahora a la altura de mediados de octubre. Todo ello de cara a abordar tres cuestiones: primero, incremento de las pensiones, segundo la subida salarial de los funcionarios y tercero, una revisión de la política salarial. Desde el Partido como desde el GPS se optaría, simplemente, por *tomar nota*⁵⁷¹.

En esta situación de creciente *inmovilismo* mucho pesaría el voluntarismo político antes económico de Carlos Solchaga, a la sazón Ministro de Economía, quien, de nuevo, se obstinaría en no superar el 3% de inflación. Parecía que con dicha cifra casi tautológica se pudiera obtener aquella buscada *cuadratura* de que se denominaría, más adelante, el “círculo virtuoso” de la política económica socialista. Como había ocurrido en el anterior ejercicio fiscal ni los más optimistas análisis podían certificar y menor apoyar tales previsiones. Asimismo la historia se repetiría: no habría rectificación⁵⁷². Y como en tantas otras ocasiones se optaría por dejar pasar el tiempo, que la conflictividad se desinflará, hasta la próxima negociación. Una estrategia que, en aquella ocasión, fallaría estrepitosamente.

Incluso, las críticas a la ortodoxia económica de Economía se producirían, por primera vez en mucho tiempo, desde el propio Grupo Parlamentario Socialista en una reunión centrada en los PGE. Celebrada un 18 de octubre de 1988, un conjunto de diputados socialistas insistirían en la necesidad de un “mayor rigor en la lucha contra el fraude fiscal y menores deducciones fiscales para quienes más tienen”⁵⁷³. Por aquí también se repetiría la misma historia, en base a viejos argumentos tantas veces esgrimidos. Primero, se cerraría la posibilidad de cualquier modificación parcial. Y ello tanto desde el Gobierno como desde la propia CEF del PSOE. Y segundo, se volvería a sacar a relucir la denuncia de que se trataba de una campaña de acoso y de descalificaciones contra el Gobierno⁵⁷⁴. La monotonía argumentativa socialista también era una realidad contrastada.

Plenamente confiados en sus fuerzas políticas, y siempre bajo el argumento de su mayoría parlamentaria, se acompañaría dicha política de “no diálogo” de las constantes acusaciones y amenazas contra las posibles medidas que atentarán contra la estabilidad

⁵⁷¹ Véase, por lo demás, Noticia, Carmen Parra, “El Grupo Socialista «toma nota» de las peticiones de UGT y las traslada a la ejecutiva del PSOE”, *El País*, 18 de octubre de 1988.

⁵⁷² Noticia, “El Gobierno no revisará las pensiones ni los sueldos de los funcionarios de 1988”, *El País*, 28 de octubre de 1988.

⁵⁷³ Noticia, Gustavo Matías, “Diputados socialistas juzgan ante Solchaga poco redistributivos los Presupuestos del Estado para 1989”, *El País*, 19 de octubre de 1988.

⁵⁷⁴ Noticia, Carmen Parra, “La ejecutiva del PSOE no atenderá las peticiones de UGT”, *El País*, 21 de octubre de 1988. Véase el comunicado de la propia CEF del PSOE tras su reunión celebrada el 17 de octubre con respecto a los PGE de 1989, en donde se aportarían numerosos datos defendiendo el ‘carácter social’ de los mismos. Incluso José María Benegas no tendría problema alguno en afirmar como los mismos «son los mejores que hemos organizado desde que estamos en el Gobierno». Noticia, “Los presupuestos de 1989, en el marco de la política del Gobierno”, *El Socialista*, n° 464, (1988), p. 4. Y unos días más tarde, Noticia, “El PSOE califica de demagógicas las críticas a los presupuestos”, *El País*, 28 de octubre de 1988. Un reporte que recogería unas declaraciones antológicas de Francisco Fernández Marugán y que evidenciaban la fuerte instalación del ‘síndrome NHA’ dentro de las filas socialistas: «Por su parte, Fernández Marugán propuso que ‘la sociedad española adquiera gusto por la estabilidad económica’». De este último político socialista, véanse sus reflexiones sobre la concertación social poco tiempo después en: FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Las políticas europeas de concertación social y de democracia industrial”, *Sistema*, n° 91, (1989), pp. 17-28.

presupuestaría y el mantenimiento de la inflación. *Amenazas* que, una vez más, tenían en el punto de mira la capacidad adquisitiva de los trabajadores⁵⁷⁵.

Con todo algo se movía la singular escenificación política sindical-negociadora que se repetía cíclicamente en sus trazos elementales. Por ahí, justamente, los costes del divorcio de la familia socialista, empezaron a evidenciar que las antiguas vías de solución ensayadas para solucionar o al menos salir del atolladero en este tipo de negociaciones, no tenían ya validez⁵⁷⁶. Nos referimos a los contactos personales entre los principales líderes del Partido, Gobierno y del Sindicato, generalmente a través de reuniones secretas y confidenciales.

Reuniones, hecho, no faltarían. Lo que fallarían serían los previsibles resultados de aminorar o templar posibles rebrotes conflictivos con pequeñas cesiones que no cambiarán en nada lo sustancial en términos económicos, como había sido la tónica. Así por ejemplo a poco menos de un día de un Consejo de Ministros tomara una decisión que cambiaría el ritmo histórico de la época socialista, se conocía que Felipe González y Nicolás Redondo se habían reunido en secreto para tratar de limar diferencias, en lo básico, en torno a la política salarial. Allí una vez más González le señalaría que la política del ejecutivo es “correcta y la única posible”⁵⁷⁷.

Cuando se cumplía el 6º aniversario del triunfo electoral del 28 de octubre de 1982, el viernes de veintiocho de octubre el Consejo de Ministros aprobaría las líneas generales del conocido Plan de Empleo Juvenil⁵⁷⁸. Sin prácticamente anuncio previo, y tras las duras contestaciones a su propuesta de mayo al documento presentando en mayo por el PSOE, desde el Gobierno, ahora, se volvía a retomar un proyecto que sabía que sería duramente criticado y cuestionado. Una peculiar forma de celebrar tan magna efeméride.

Lógicamente no faltarían las correspondientes llamadas al diálogo así como la presentación de las supuestas bondades del PEJ. Llegados aquí cabe interrogarse: ¿por qué desde el Ejecutivo en una situación de creciente conflictividad, de ruptura de cualquier posible diálogo social más tras la negativa a *no tocar ni una coma* de los PGE, volvía a la *carga* con tal propuesta? ¿Un órdago político? ¿Un suicidio político? O, ¿intento de evidenciar que no se cedería a lo que se considera un continuado “chantaje sindical”?

Como previamente se ha advertido, junto con la arrogancia a la hora de gobernar, los frecuentes ataques a los sindicatos por lo que se considera que era una “oposición política” antes que el desarrollo de una estricta tarea sindical, aquella decisión política se volvería muy pronto en su contra⁵⁷⁹. Como han reconocido no pocos dirigentes socialistas con el paso del mismo –

⁵⁷⁵ Noticia, Gustavo Matías, “Solchaga advierte que tomará medidas estabilizadoras si los salarios crecen por encima del 5% en 1989”, *El País*, 26 de octubre de 1988.

⁵⁷⁶ Clarificador sería al respecto el trabajo de, JULIÁ, Santos, “Ruptura de familia” en JULIÁ, Santos, PRADERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la..., op.cit.*, pp. 640-643.

⁵⁷⁷ Noticia, Carmen Parra, “González y Redondo se han reunido en privado para intentar reducir discrepancias”, *El País*, 27 de octubre de 1988.

⁵⁷⁸ Noticia, Marta Zhein y Carmen Parra, “El Consejo de Ministros aprueba el plan de empleo juvenil, que discutirá con centrales y patronal”, *El País*, 29 de octubre de 1988.

⁵⁷⁹ Hecho reconocido por el propio Alfonso Guerra tiempo después cuando se refería a los antecedentes inmediatos al 14-D: «Sé que hubo en aquella descalificación del Gobierno alguna responsabilidad de este. El discurso arrogante de los que desde el Ejecutivo despreciaban los argumentos políticos dirigidos a hacer comprender la acción del Gobierno, a hacer ver los datos del balance general de los cambios, sin negar que puntualmente algunas restricciones fueran necesarias para impulsar la capacidad de generación de riqueza nacional, creó una desconfianza sobre las intenciones de muchas medidas gubernamentales que no lograban traspasar el muro de la incomunicación». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los..., op.cit.*, p. 323.

que no en su momento histórico presente— la misma se trocaría en un error político de calado⁵⁸⁰. Y eso que los socialistas nunca serían propenso a tipo de labores expiatorias. Un *error* al que se sumarían otros tantos en los casi dos siguientes meses del invierno de 1988.

Instalados en la creencia de su invulnerabilidad electoral —que, en todo caso, se mostraría cierta, al menos, hasta 1993— junto con una visión elitista del poder político y firmemente convencidos de que no existía otra “política económica posible”; tampoco favorecería las posibles opciones del PEJ al afirmar, al mismo tiempo, que la puerta del diálogo estaba abierta pero que el “margen de maniobra que hay es que «no se quiebra la naturaleza y la filosofía del plan»”⁵⁸¹. Un mal punto de partida teniendo en cuenta los consabidos antecedentes. Como también sería un mal punto de partida que el propio Ministro de Trabajo, Manuel Chaves, afirmará —antes que insinuar— la aparente obstinación de los sindicatos en no firmar acuerdo social alguno, a pesar de la “generosidad” de las propuestas presentadas, y que los mismos se estaban alejando de las líneas de actuación de los sindicatos europeos⁵⁸². Argumento este último que repetido en más de una ocasión se trataría a asimilar al de *anti-moderno*, adjetivo descalificativo donde los hubiera en tiempo de los gobiernos socialistas.

También en la larga lista de desaciertos, sin ningún género de duda, pesaría el rechazo a la propuesta de su único y fiel aliado, la CEOE, de cara a “recuperar la concertación social”, viendo el panorama de contestación laboral-social que se aproximaba. En un repentino gesto de soberbia, Felipe González afirmaría como “no asume, a corto plazo, la responsabilidad de reunir a todos los interlocutores sociales para tratar de llegar a una concertación general”⁵⁸³. Declaraciones que se producían al día siguiente de que Manuel Chaves llamara al *diálogo*. Un ejemplo, sin duda, de coordinación gubernamental.

Preocupada la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ante la aparente distancia con la que observaba la labor del Ejecutivo, y teniendo presente la *unidad de acción* alcanzada por UGT y CCOO así como su ofensiva anti-precarizadora; redactaría y enviaría al Presidente del Gobierno un largo memorando con todas sus reivindicaciones clásicas y nuevas, en una estrategia destinada a remarcar su posición, pues más que pudiera contribuir a encender todavía más los ánimos de lo que el propio Cuevas auguraba que sería un “otoño con fuerte crispación social”⁵⁸⁴.

Uno de los puntos fuertes del citado *memorándum* subtítulo, “La competitividad y el progreso social en España, en el marco de la construcción europea”, era precisamente lo que se

⁵⁸⁰ Por ejemplo Manuel Chaves declararía: «Quizás nos ‘pasamos’ un poco en el plan de empleo juvenil, o yo, me pasé, si debo asumir toda responsabilidad. Creo que me pasé de una manera importante cuando planteamos el plan de empleo juvenil: era un contrato que facilitaba mucho la contratación de los trabajadores jóvenes, pero esa contratación favorecía a los empresarios. Pero yo no creo que fueran contratos basura [...]. Eran contratos de seis meses para jóvenes mayores de 18 años [...] El contrato basura fue posterior [...]. Pero efectivamente, no era un contrato que respondiera a la estabilidad que entonces pedían los sindicatos». Declaraciones en, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 322. De quien llegara a ser Ministro de Trabajo véanse sus trabajo de carácter teórico-político, CHAVES, Manuel, “Los sindicatos en la sociedad industrial desarrollada”, *Leviatán*, n^o 37, (1989), pp. 25-34; id., “Democracia industrial y relaciones de trabajo”, *Sistema*, n^o 94-94, (1990), pp. 183-188.

⁵⁸¹ Noticia, Carmen Parra, “El Plan de Empleo Juvenil se complementará con incentivos a la contratación indefinida”, *El País*, 30 de octubre de 1988.

⁵⁸² Noticia, Carmen Parra, “A Chaves le preocupa que las centrales sindicales no hayan firmado ningún pacto en los tres últimos años”, *El País*, 30 de octubre de 1988. Muy ilustrativo de la visión de los políticos y técnicos socialistas sería el artículo de, ESPINA, Álvaro, “Los sindicatos y la democracia”, *Leviatán*, n^o 41, (1990), pp. 25-40.

⁵⁸³ Noticia, Javier Ortega, “Felipe González rechaza la petición de la CEOE de convocar a todos los interlocutores sociales para la concertación”, *El País*, 31 de octubre de 1988.

⁵⁸⁴ Noticia, Javier Ortega, “Felipe González rechaza la petición de la CEOE de convocar a todos los interlocutores sociales para la concertación”, *El País*, 31 de octubre de 1988.

anunciaba como “La flexibilidad del sistema será la clave del éxito”. A partir de las clásicas recomendaciones de la OCDE, el FMI o la Comisión de las Comunidades Europeas, retomaba su particular batalla contra las “rigideces en el mercado laboral” y “que es preciso superar, alcanzando los niveles de flexibilidad y adaptación que son habituales en otros Estados miembro de la Comunidad [Europea]”. Con desmedido afán igualitario completaba su argumentación de la siguiente forma:

«No pretende la CEOE en ningún caso el debilitamiento del sistema jurídico de protección de los trabajadores, sino su modernización y adaptación al de otros países del entorno, con el fin de hacerlo más eficaz y evitar, en sentido contrario, la situación actual, en la que nuestro sistema obsoleto protege cada vez a menos trabajadores, y es una de las causas del florecimiento de la economía sumergida».

Había llegado la hora de la “concertación, entendida como un proceso de consenso y compromiso del Gobierno y las organizaciones sociales representativas”. Bajo el reto de afrontar la entrada en el Mercado Único, se volvían a remarcar las *consabidas* recetas, que, otra vez, tenían no pocos parecidos con las del Gobierno: *moderación salarial*, “política monetaria [que debe] velar por la estabilidad de los precios”, “reducir el déficit público”, “modificar el sistema de financiación de la Seguridad Social”... y otros tantas medidas relacionadas con la flexibilidad laboral⁵⁸⁵.

Conocidas las propuestas de los denominados *agentes sociales*, los socialistas comenzarían a andar por un camino de *no retorno*. Junto con los factores previamente apuntados, pesaría en tal actitud y predisposición la creencia que la UGT no tensaría una situación ya de por sí complicada. Más aún confiaban en reconducir tales posiciones a través de la senda del diálogo como había sucedido en tantas ocasiones pasadas. Ello sin obviar, que había que dar una pronta respuesta a otro problema inclusive más peligroso: evitar la cada vez más fuerte “unidad de acción” con CCOO, al que se seguía calificando gratuitamente de sindicato comunista⁵⁸⁶.

La percepción de que UGT no provocaría tensiones innecesarias constituía, además, de un *error de cálculo* considerable, era también la muestra palpable de cómo se habían omitido, de forma consciente y persistente, todos y cada uno de los documentos y sus propuestas ya descritas. Pero ante todo se omitirían los claros mensajes que se venían ofreciendo, de forma constante, desde la UGT. Sin ir más lejos, una semana antes del Consejo de Ministros del 28 de octubre de 1982, UGT organizaría unas jornadas de acción sindical en Madrid, en donde tras una dura crítica a la falta de concertación social, se sumarían todo un conjunto de duras críticas contra el permanente incremento de la flexibilidad, y avisando que el modelo laboral aprobado en 1984 había tocado a su final⁵⁸⁷. En esta progresiva diferenciación mucho pesaría también la

⁵⁸⁵ AHFFLC, CEOE, “Memorándum al Gobierno: La competitividad y el progreso social de España, en el mercado de la construcción europea”, Madrid, 1988, sig. 001875-002.

⁵⁸⁶ Véase aquí al respecto, ZUFIAUR, José M^a, “Espacios políticos, autonomía sindical y unidad entre los sindicatos”, *Relaciones Laborales. Revista Crítica de Teoría y Práctica*, nº 1, (1996), pp. 243-253.

⁵⁸⁷ Entre otras cuestiones se afirmaba: «Al respecto, hemos de reiterar el carácter meramente coyuntural que tuvieron las diversas formas implantadas en el año 84 como medidas para conseguir un mayor reparto del mercado de trabajo. Sin embargo, la filosofía que inspiró la modificación del art. 15 del E.T. (que establece distintos tipos de contratación eventual) fue desbordada por el desarrollo reglamentario que del mismo se efectuó, introduciendo elementos altamente flexibilizadores y contrarios a los principios que inspiraron dicha reforma. Por ello, podemos afirmar que se está produciendo una desnaturalización de los distintos tipos contractuales admitidos en nuestra legislación». Y se advertía de forma, quizás, premonitrice en su último párrafo: «Por tanto, rechazamos cualquier otra fórmula contractual de nueva creación que lleve aparejada la exclusión de los jóvenes del mercado de negociación colectiva, mayores incentivos empresariales y abaratamiento de la mano de obra. Lo contrario supondría a una precarización sin límites». AHFFLC, UGT, *Jornadas de Acción Sindical*, Madrid, 21 y 22 de octubre de 1988, sig. AI 324 [s/p]. Véase también lo apuntado en la *nota* 552.

forma de (auto)representación pública y mediática de dos culturas políticas, entonces, ya claramente diferenciadas.

Imbuidos en sus propias creencias y percepciones, aquel cálculo de posibilidades políticas que realizarían los socialistas, se vendría totalmente abajo dos semanas después, cuando CCOO y UGT convocarían un viernes 12 de noviembre la huelga general para el 14 de diciembre. Tampoco se podía imaginar el Gobierno las dimensiones históricas que alcanzaría la propia convocatoria de paro general. De ahí que el estudio detenido de lo que sucede en dichas semanas cobre una relevancia de primer orden, de cara a interpretar las propias dinámicas intrínsecas que acompañaría a la economía política del socialismo.

Distantes pero todavía prudentes, y limando en lo posible las críticas a los sindicatos a las ya consabidas, el margen de cualquier posible rectificación gubernamental iría disminuyendo progresivamente. En las dos siguientes semanas al anuncio del PEJ predominarían los movimientos tácticos previos a cualquier negociación. Marco de operaciones en donde los socialistas habían demostrado una hábil capacidad de *dar la vuelta* a difíciles situaciones de partida.

Los primeros días de noviembre no depararían grandes sorpresas. Tras las primeras reacciones en contra al PEJ por parte de los sindicatos como por parte de no pocos movimientos sociales, con especial protagonismo de los *agentes juveniles*, el lunes 31 de octubre se anunciaba la convocatoria gubernamental para el jueves 3 de noviembre para tratar de iniciar las negociaciones del Plan de Empleo Juvenil. Convocatoria enviada a CCOO, UGT y CEOE, y que se preveían por separado⁵⁸⁸. Por otro lado, el martes 1 de noviembre en un rápido gesto político, Felipe González, enviaba una carta a José María Cuevas rectificando su posición con respecto al diálogo social, aunque mostrándose esquivo en cuanto a plazos y contenidos, y matizando que el posible arranque de un diálogo se produciría “cuando se den las circunstancias precisas”⁵⁸⁹.

Mientras tanto, desde las mismas páginas de *El País*, el mismo jueves 3 de noviembre, el Secretario de Estado de Empleo, Álvaro Espina, publicaba un largo artículo –“Demos una oportunidad a los jóvenes”, se titulaba– en donde tras calificar la situación de desempleo juvenil de “emergencia”, hablaba, entre otras cuestiones, de “repartir entre un número mayor de personas el trabajo demandado por las empresas”, y subrayando las inmensas posibilidades que se abrían con el PEJ para los jóvenes, pero también para la sociedad en su más amplio conjunto⁵⁹⁰.

En un nuevo ejemplo de inteligencia política y de talento negociador, el Ministro de Trabajo decidiría desconvocar las siguientes reuniones previstas tras el más que el previsible rechazo al PEJ en tal reunión. Una vez más, el único apoyo al mismo vendría de la mano de la CEOE. En todo caso, el texto que se entregaría a los sindicatos, con las propuestas en firme del PEJ, incluso iría un paso más allá del documento de mayo, al incluirse mayores deducciones fiscales y otros incentivos en materia de subvenciones. No sólo, pues, Chaves declararía como era “inaceptable que las centrales planteen como condición *sine qua non* que el Gobierno retire el plan de empleo juvenil”. Convencido de su incuestionable necesidad, también se informaría como con o sin diálogo, con o sin acuerdo, el “Gobierno pondrá en marcha sus planes para que entren en vigor el próximo mes de enero”. Concluía el *non nato* proceso negociador en torno al PEJ, al menos, a nivel oficial⁵⁹¹.

⁵⁸⁸ Noticia, “El jueves se inician las consultas sobre el plan de empleo juvenil”, *El País*, 1 de noviembre de 1988.

⁵⁸⁹ Noticia, “González notifica a la CEOE su deseo de reabrir el proceso de concertación”, *El País*, 2 de noviembre de 1988.

⁵⁹⁰ ESPINA, Álvaro, “Demos una oportunidad a los jóvenes”, *El País*, 3 de noviembre de 1988.

⁵⁹¹ Noticia, Carmen Parra, “El 50% de los jóvenes acogidos al plan de empleo se quedarán fijos en las empresas, según la CEOE”, *El País*, 4 de noviembre de 1988.

Al día siguiente, viernes 5 de noviembre, se conocería como primera vez en su reciente historia diversos sectores con peso dentro de la UGT, barajaban la posibilidad de convocar una huelga general contra el PEJ. Todo ello de cara a la reunión del Comité Confederal a celebrarse el viernes y sábado de la misma semana⁵⁹². Un paso histórico inédito. Una idea que maduraría a un ritmo veloz, aunque por el momento se evitaría el propio empleo de *huelga general* –con connotaciones de no poco alcance dentro del sindicato socialista por razones históricas evidentes– y se hablaría a lo sumo de movilizaciones generales, o, en expresión, de José María Zufiaur “movilizaciones confederales”⁵⁹³.

En un terreno de operaciones cada vez más clarificado, la semana que va del 7 al 13 de noviembre, se produciría otro hecho histórico. Por primera vez, organizaciones juveniles estatales agrupadas en una gran Plataforma Juvenil contra el PEJ iniciaban una campaña de información, que culminaría en una marcha a Madrid el 1 de diciembre⁵⁹⁴. Un acontecimiento inédito que visualizaría, por primera vez, la oposición política juvenil contra el Gobierno socialista, en donde los siempre esgrimidos jóvenes en cada normativa laboral adquirirían un protagonismo de primera fila. Incluso desde el Departamento Confederal de Juventud de la UGT se diseñaría una amplia “guía de campaña” que subtitulada, *Felipe, eso no*, venía a recoger los principales puntos de las demandas ugetistas por el empleo juvenil, a la par que denunciaba los numerosos incumplimientos del Ejecutivo al respecto⁵⁹⁵.

Al compás de la organización y preparación de estas importantes movilizaciones, desde el Gobierno se mantendría un indicativo silencio con alguna que otra declaración del mismo

⁵⁹² Noticia, “UGT estudia hoy la convocatoria de una huelga general”, *El País*, 4 de noviembre de 1988. Véase también, AHFFLC, UGT-CEC, “5º Comité Confederal ordinario celebrado en Madrid el 4 y 5 de noviembre de 1988”, Madrid, 1988, sig.ant. A/38/17.

⁵⁹³ Noticia, Carmen Parra, “Dirigentes de UGT proponen al Comité movilizaciones generales contra la política del Gobierno”, *El País*, 5 de noviembre de 1988; Noticia, “UGT convoca paros generales contra la política del Gobierno, que concretará con CCOO”, *El País*, 6 de noviembre de 1988. Una noticia en donde tras confirmarse que se mandataba a la CEC a tomar la decisión última, se aprobaría una resolución que «indica que las ‘acciones de protesta pretenden un cambio de orientación de las posturas defendidas por el Gobierno y los empresarios’. Nicolás Redondo y otros dirigentes de UGT matizaron que no se trata de una huelga general, por las connotaciones históricas y políticas del término, y porque el objetivo no es derribar al Gobierno, sino que cambie la política económica y social». De hecho, en un comunicado interno de la CEC de UGT fechado el 8 de noviembre de 1988 se evitaría emplear tal termino: «A este respecto la CEC de UGT quiere manifestar que dichas movilizaciones generales tendrán exclusivamente un carácter sindical y reivindicativo con la única finalidad de que el Gobierno reconsidere una serie de medidas que en materia socio-económica está tomando y que a juicio de UGT perjudica claramente los intereses de los trabajadores. Asimismo es necesario hacer ver a este Gobierno la necesidad de consensuar cualquier medida que afecte al conjunto de los trabajadores, así como que dicho acuerdo esté basado en medidas que beneficien y no perjudiquen, a los colectivos más desfavorecidos (jóvenes y desempleados en general, pensionistas y trabajadores)». AHFFLC, UGT-Secretaría de Comunicación e Imagen, “UGT analiza un plan de acción contundente contra medidas lesivas para los trabajadores”, Madrid, 8 de de noviembre de 1988 [localizado en AHFFLC, UGT-CEC, “6º Comité Confederal ordinario celebrado en Madrid el 24 y 25 de abril de 1989”, sig.ant. A/38/19].

⁵⁹⁴ Noticia, Carmen Parra, “Las organizaciones juveniles, con apoyo de CCOO y de UGT, convocan una marcha a Madrid contra el plan de empleo”, *El País*, 8 de noviembre de 1988. Por su parte, UGT y CCOO elaborarían un comunicado en donde se animaba a participar con *entusiasmo* en la citada marcha, remarcando como tales sindicatos «que venimos luchando desde hace años por un presente y un futuro mejor para todos los trabajadores y sus familias, tiene siempre presente que los jóvenes son ciudadanos de pleno derecho, que no pueden ser marginados en el momento de adoptar decisiones de tanta trascendencia como el llamado ‘contrato de inserción’, que rechazamos frontalmente porque es un atentado contra los jóvenes y el empleo». AHFFLC, “Comunicado de UGT y CCOO ante la marcha de jóvenes sobre Madrid”, Madrid, 1 de diciembre de 1988 [localizado en AHFFLC, UGT-CEC, “6º Comité Confederal ordinario celebrado en Madrid el 24 y 25 de abril de 1989”, sig.ant. A/38/19].

⁵⁹⁵ AHFFLC, UGT-Departamento Confederal de Juventud, “Guía de campaña por un futuro con empleo. «Felipe, eso no»”, Madrid, noviembre de 1988, sig. 001802-004.

Chaves afirmando su preocupación por tales actitudes, a su forma de ver incomprensibles. A ello se sumaría las declaraciones de la CEOE, en dicho caso a través de Juan Jiménez Aguilar, remarcando con un gran sentido de la inoportunidad política como las anunciadas movilizaciones “tienen un sentido más político que sindical y no son compartidas por la mayoría de la sociedad”⁵⁹⁶.

Pasaban los días y se acercaba la fecha de reunión prevista por CCOO y UGT para tomar la *gran* decisión, mientras que más sectores y colectivos se iban sumando a nuevos paros y a las diversas convocatorias programadas⁵⁹⁷. Un día antes de la reunión prevista para el 12 de noviembre, Redondo trataría de evitar lo inevitable, aunque con escaso entusiasmo, al anunciar que las citadas movilizaciones generales no confluían en una huelga general⁵⁹⁸. No pudo ser. El mismo sábado se conocía la convocatoria de la huelga general del 14 de diciembre. Un paro general de 24 horas convocado por los grandes sindicatos de clase, al que se acompañaría de un apretado calendario de movilizaciones⁵⁹⁹.

Dos semanas después la UGT publicaría un documento que titulado “Las razones del rechazo al contrato de inserción profesional”. Texto en donde exponía las 16 grandes razones que le habían llevado a tomar aquella decisión. Como había sucedido anteriormente con las *170 medidas* y otras tantas iniciativas tampoco la misma merecía contestación alguna desde el entorno socialista. Entre las numerosas razones expuestas, una iba al meollo de todo lo que se venía denunciando y exponiendo desde hacía seis meses y que ahora se veía confirmado:

«El contrato de inserción es una norma innecesaria que discrimina negativamente a los jóvenes, negándoles derechos tan elementales como el derecho de todo trabajador a la negociación colectiva, y rompe el consenso entre los interlocutores sociales, ya que modifica unilateralmente el Estatuto de los Trabajadores»⁶⁰⁰.

Desde ese mismo momento se asiste a una aceleración de los tiempos político. Con varias características a resaltar. La primera, y más importante, tanto desde el Gobierno como desde el PSOE, con el apoyo del Grupo PRISA –principalmente por y a través de *El País*⁶⁰¹– en primera línea emprenderán una campaña en defensa del PEJ, pero también en contra de lo que se consideraba que no era más que una *oposición política sindical*. Una campaña que, más pronto que tarde, se tildaría del *miedo*, y que se constituiría, al mismo tiempo, en un ejemplo, en términos políticos, de lo que no se debe hacer para que triunfe una huelga general y. además, se *cargue* de todavía más razones al “adversario”⁶⁰².

De “histórica reacción” lo calificaría el siempre moderado Charles Powell, quien señalaría, igualmente, como se combinaría una “mezcla insólita de autismo y arrogancia [que]

⁵⁹⁶ Noticia, Carmen Parra, “El secretario general de CCOO considera el plan de empleo juvenil más regresivo que la Ley de Pensiones”, *El País*, 9 de noviembre de 1988.

⁵⁹⁷ Noticia, Marta Zhein, “UGT y CCOO convocan huelgas en construcción, metal y Administración, previas al paro general”, *El País*, 11 de noviembre de 1988.

⁵⁹⁸ Noticia, Javier Ortega, “Redondo no negociará con CCOO la huelga general”, *El País*, 12 de noviembre de 1988.

⁵⁹⁹ Noticia, “Redondo y Gutiérrez acuerdan un paro general de 24 horas por el giro social no logrado en la concertación”, *El País*, 13 de noviembre de 1988.

⁶⁰⁰ AHFFLC, UGT, “Las razones del rechazo al contrato de inserción profesional”, Madrid, 29 de noviembre de 1988, sig. 001875-002.

⁶⁰¹ Véase el balance presentado por quien fuera uno de los principales redactores del citado medio de comunicación: MONTEIRA, Félix, “La huelga general” en JULIÁ, Santos, PRADERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la... op.cit.*, pp. 625-634.

⁶⁰² Véanse, al respecto, los propios argumentos esgrimidos por, GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los... op.cit.*, pp. 326-327, quien evitaría asumir cualquier tipo de responsabilidad por activa o por pasiva en tal *campaña*.

contribuyó a estrechar todavía más los lazos entre UGT y CCOO⁶⁰³. Una vana movilización que es el antecedente más directo de lo que se considerará, en breve, toda una derrota histórica. De hecho, buena parte de la campaña socialista se llevaría a cabo en las páginas de *El Socialista*, que, en esta ocasión, se nos revelan como un testimonio histórico excepcional.

De inmediato, y sin tiempo que perder –aunque sin un necesario periodo de reflexión– desde el PSOE se anunciaría una movilización general del conjunto de la organización para *detener* lo que se consideraba una ofensiva contra el Gobierno, y que además buscaba –a falta, eso sí, de evidencias, al menos, palpables y no digamos documentales– influir, ni más ni menos, que en las elecciones europeas previstas para junio de 1989.

Previamente a la convocatoria del 14-D –a la altura de noviembre– aparecía publicada una foto con un adulto y un joven obreros con mono azul y casco blanco puestos, encabezando una noticia en *El Socialista* de cara a ilustrar la aprobación del PEJ, y se titularía: “ofrecer a los jóvenes una oportunidad de insertarse en la sociedad”. Noticia, en donde también se recogerían unas palabras del Álvaro Espina –Secretario de Estado de Empleo– en las que podía leer textualmente: “Si los sindicatos se auto-marginan [...] y se colocan de espaldas a lo que quiere la mayoría de los ciudadanos, va a producirse un hecho grave de alejarse de la sociedad”⁶⁰⁴.

No se entraría a valorar entonces ni más adelante las razones reales y de peso de la convocatoria general de paro previsto para un miércoles 14 de diciembre. Mismos argumentos junto con mismos comportamientos públicos se repetirían en una progresión cada vez más radicalizada, en donde tanto el Gobierno como el PSOE interpretarían que se estaba poniendo entredicho todo su accionar y todos sus éxitos. Lo que sumado al menosprecio de la capacidad de convocatoria y una dialéctica medida y basada en términos dicotómicos en base a una representación a *amigos* y *enemigos*, terminarían combinándose en un *coctel explosivo* que estallaría en poco más de un mes. Para empezar se hablaría de un acoso político contra un Gobierno, que había realizado ímprobos esfuerzos en política social⁶⁰⁵.

En una nación que no hacía más que una década escasa había conquistado la libertad y la democracia, y en donde a pesar de conocer más de una huelga general, y dos ciclos conflictos obreros intensos; sin embargo, dicha convocatoria adquiriría tempranamente un carácter diferente por el propio contexto en el que se circunscribía, que no era otro que el de un país en pleno *boom* económico⁶⁰⁶. No pocas lecciones aprenderían todas las partes implicadas.

Así mismo como todo paro general convocado, el mismo generaría un marco de actuación repleto de incertidumbres, tensiones pero también de inesperadas sorpresas. Por ejemplo, que desde el Grupo Popular del Congreso, a pesar de mostrarse en contra de la convocatoria del 14-D, se señalara como “la culpa no la tienen los sindicatos, sino el empecinamiento del Gobierno”. Para añadir a continuación por boca de su portavoz, Juan Ramón Calero que “hay cuestiones reivindicativas de los sindicatos que no se pueden conceder, pero otras, sin embargo, sí, como los 78.000 millones de pesetas solicitados para todos para compensar a funcionarios y pensionistas”⁶⁰⁷. Aquella sería la primera reacción no esperable de otras tantas que vendría durante las siguientes semanas.

⁶⁰³ POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 433.

⁶⁰⁴ Noticia, “Plan de empleo juvenil: ofrecer a los jóvenes una oportunidad de insertarse en la sociedad”, *El Socialista*, nº 465, (1988), pp. 1, 3.

⁶⁰⁵ Noticia, “El PSOE movilizará a sus militantes para defender al Gobierno del «acoso político» de la oposición y los sindicatos”, *El País*, 13 de noviembre de 1988.

⁶⁰⁶ Por ejemplo para aquellas mismas fechas, Noticia, “Las empresas cuadruplican sus beneficios en dos años”, *El País*, 16 de noviembre de 1988.

⁶⁰⁷ Noticia, “La oposición acusa al Gobierno de la reacción de los sindicatos”, *El País*, 14 de noviembre de 1988.

Por su parte, el principal diario de la nación y a su vez principal referente de la izquierda y concretamente del progresismo español, iniciaría también su singular campaña a través, primero, de una serie de editoriales así como de la filtración interesada de determinadas hechos, casi siempre, vinculados a los problemas internos de la UGT. Así el lunes 14 de noviembre publicaría uno de sus editoriales más recordados. “Una huelga política”, se titularía. Y allí se desgarnaría toda una serie de convincentes argumentos que parecían venir redactados desde La Moncloa. Entre ellos el carácter político de la huelga –reproduciendo consciente o inconscientemente los mismos argumentos que el franquismo empleaba para deslegitimar y represaliar las huelgas obreras⁶⁰⁸– con el fin no declarado de finiquitar lo que se denominaba la política socialdemócrata del Ejecutivo:

«El paro general anunciado por las centrales sindicales para forzar un *giro social* en la política económica del Gobierno no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico [...].

En cualquier caso, lo que resulta excesivo es organizar una serie de movilizaciones que desemboquen en una huelga general (púdicamente llamada *paro general*), que perturbará seriamente la marcha del país si obtiene éxito, con objeto de hacer avanzar una serie de reivindicaciones que no han sido claramente definidas. Los Presupuestos Generales para 1989, son, de por sí, suficientemente expansivos, probablemente en exceso, dada la marcha actual de la economía [...].

En realidad se trata de un pulso político entre los sindicatos y el Gobierno. El resultado previsible no es que el Gobierno modifique su política económica, pero sí que se produzca una deslegitimación del proyecto socialdemócrata [...]. De ser cierta esta interpretación, nos encontraríamos ante una nueva paradoja: el escaso peso de la posición política ha creado un vacío hacia el que han sido aspirados los sindicatos, que plantean, de manera indirecta, una confrontación de carácter político con el Gobierno»⁶⁰⁹.

El mismo periódico a finales de la misma semana, en concreto, el sábado 19 de noviembre, replantearía sus propios argumentos en una singular llamada al diálogo social. Tras recordar como la “ausencia de competidores llevó al Gobierno a confundir el diálogo con el soliloquio”, y criticar el discurso tecnocrático de los propios socialistas –“Los políticos que han aprendido los rudimentos de la ciencia económica una vez el poder suelen mostrarse especialmente profesoriales cuando aleccionan a los ignorantes alumnos sobre las evidencias”– y reconocer parte de la vigencia de las demandas sindicales, concluía: “Todo lo que no conduzca al ahogo del diálogo social y la esterilización del debate político contribuye a la negación misma del sistema”⁶¹⁰. Un *giro editorial* que se convertiría en una primera llamada de atención al proceder de los propios socialistas.

El lunes 14 de noviembre en una reunión de la CEF del PSOE se daría forma e inicio de su singular campaña partidista. Implicar y volcar a toda la organización de cara a frenar la huelga general prevista para un mes después, y explicar, en paralelo, la política social del Ejecutivo serían sus ejes teóricos esenciales. El lema central elegido no dejaba a dudas de la posición adoptada por la ejecutiva del PSOE: “No a la huelga general”. Todo ello cuatro columnas en un encendido número de *El Socialista*. El comunicado que allí se podía leer era,

⁶⁰⁸ Véase aquí el apartado “3.3. Debates, lecturas, controversias en torno al *nuevo* movimiento obrero en la España de la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos”.

⁶⁰⁹ Editorial, “Una huelga política”, *El País*, 14 de noviembre de 1988. Consúltase asimismo el editorial a favor del PEJ que publicaría *Diario 16* unos días antes, en donde tras cuestionar su idoneidad, también afirmaría: «Pero este plan no puede contemplarse como un regalo que el Gobierno y los contribuyentes hacen a los empresarios». Editorial, “El Empleo Juvenil como mal menor”, *Diario 16*, 6 de noviembre de 1988.

⁶¹⁰ Editorial, “La perversión del debate político”, *El País*, 19 de noviembre de 1988.

sin más adjetivos de los necesarios, una declaración de guerra contra el movimiento sindical⁶¹¹. “Irresponsable e injustificada” se añadiría para más señas⁶¹².

En todo caso, tras llamar a evitar la *dramatización* de la situación, también se haría otra apelación de no poca importancia: “evitar enfrentamientos de tipo personal en las discusiones que se vayan a mantener en las próximas semanas”⁶¹³. En verdad, los puntos fuertes de la campaña girarían, substancialmente, en torno a los ataques personales y la deslegitimación política de los sindicatos. Más aún, pues los permanentes ataques contra los sindicatos, a los que se les tacharía de anti-modernos, irresponsables, inmaduros, violentos... se convertirían en una constante.

De hecho, mal casarían aquellas *sensatas* directrices con las permanentes descalificaciones de Benegas desde el Partido –Secretario de Organización del PSOE y líder indiscutido de la campaña socialista en adelante– y de Solchaga –a la sazón Ministro de Economía– desde el Ejecutivo⁶¹⁴. El primero de ellos, por ejemplo, no dudaría ya el domingo 13 de noviembre de hablar de una “irresponsabilidad sindical gravísima y concretamente es una irresponsabilidad de UGT”. Por enésima vez se acusaría a Redondo de haberse transformado en el “principal baluarte de la estrategia de CCOO tendente a desgastar al Gobierno”⁶¹⁵. Día sí y día también, el propio Benegas continuaría su particular campaña como sucedería, sin ir más lejos, dos días después cuando en otro alarde de estrategia política insistiría en el *seguidismo* de UGT con respecto al PCE y Comisiones Obreras, y llamaba a los empresarios a aplicar al PEJ⁶¹⁶.

Mientras que los propios sindicatos se enfrascaban en la lucha por discutir los servicios mínimos⁶¹⁷, procederían a la redacción del conocido manifiesto/comunicado “Juntos podemos”⁶¹⁸, en el que se desgranaban, punto por punto, sus propuestas y razones⁶¹⁹. Más

⁶¹¹ Portada, “No a la huelga general”, *El Socialista*, nº 466, (1988).

⁶¹² “Huelga general irresponsable e injustificada”, *El Socialista*, nº 466, (1988), p. 3.

⁶¹³ Noticia, “El PSOE moviliza a toda la organización para explicar el «giro social»”, *El País*, 15 de noviembre de 1988.

⁶¹⁴ El viernes 18 de noviembre Solchaga tildaría la huelga de *política* y denunciaba como UGT habría caído bajo los *brazos* del PCE y de CCOO. Noticia, “Solchaga, contra las movilizaciones”, *El País*, 19 de noviembre de 1988.

⁶¹⁵ Noticia, “Redondo, baluarte de CCOO, según Benegas”, *El País*, 14 de noviembre de 1988.

⁶¹⁶ Noticia, Joaquín Prieto, “Benegas pronostica el fracaso de los paros generales”, *El País*, 16 de noviembre de 1988.

⁶¹⁷ Noticia, Francesc Arroyo, “Los sindicatos no aceptarán los servicios mínimos que se convoquen el día del paro general”, *El País*, 18 de noviembre de 1988.

⁶¹⁸ En primer lugar se matizaba como el «el acuerdo no ha sido posible por la cerrada intransigencia de un Gobierno empeñado en la defensa de intereses empresariales y en llevar a la práctica medidas profundamente regresivas y contrarias a los intereses de amplios colectivos, entre los que se encuentran, precisamente lo más desfavorecidos de nuestra sociedad». Críticas aparte, los diez puntos de la *tabla reivindicativa* eran: «Retirada del llamado ‘contrato de inserción’ para jóvenes y puesta en marcha de un plan general de empleo [...]; Recuperación de al menos dos puntos de poder de compra perdido en 1988 [...]; Incremento de la cobertura de los parados hasta el 48 por 100 [...]; Equiparación de las pensiones mínimas al SMI y mejora del poder adquisitivo de todas las pensiones; Reconocimiento del derecho pleno a la negociación colectiva de los funcionarios y aumentos reales en sus retribuciones; Establecimiento de cláusula de revisión para los colectivos cuyas rentas se fijan en los Presupuestos del Estado; Incrementos reales de los salarios y establecimiento de un salario mínimo general de convenio [...]; Regulación por Ley de los beneficios empresariales que asegura su orientación hacia la creación de empleo; Amparo a los trabajadores temporales: igualdad de salarios y derechos, control sindical de las contrataciones y consolidación en el empleo; Medidas de reparto de trabajo a través de la reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación, fomentando los contratos de relevo y eliminando las horas

calmados desde el lado sindical, desde UGT se llamaría a la “renegociación de los acuerdos” y a recobrar “cordura y la tranquilidad”⁶²⁰. No habría ni renegociación ni menos cordura. Por parte del Ejecutivo como del propio PSOE a lo largo de la primera semana tras el *shock* de la convocatoria prevista para el 14 de diciembre de 1988, no faltarían las continuadas acusaciones *in crescendo* así como los primeros intentos de intoxicación político-informativa⁶²¹.

A falta de cuatro semanas para la fatídica fecha, los días que transcurren entre el 21 al 27 de noviembre, depararán otras dos notables *sorpresas* tan inesperadas como clarificadoras de los confusos momentos políticos que se viven. Primero, don Manuel Fraga afirmaría que *comprendía* la actitud de los sindicatos, rematando la *faena* al advertir que “no se puede resolver todos los problemas con los tecnócratas del Ministerio de Economía”⁶²². Y para colmo la Liga Profesional de Fútbol mostraba su comprensión con las posturas sindicales y anunciaba como, probablemente, se sumarían a la huelga⁶²³.

Por otro lado, con una CEOE timorata y bastante prudente en comparación con otras actuaciones y procedimientos anteriores⁶²⁴, el PSOE y Gobierno socialista subirían un escalón más en su campaña explicativa del PEJ. Más allá de razonar, con mayor o menos éxito, en torno al carácter social de la política económica y de los indudables beneficios que traería la aprobación del PEJ, al que no se estaba disputo a renunciar de ninguna forma⁶²⁵, se anunciaría la participación del mismísimo Presidente del Gobierno en los diferentes actos programados en relación la campaña socialista⁶²⁶. Toda una baza que había dado óptimos resultados en situaciones decisorias como ocurriría en el referéndum de la OTAN.

En cualquier caso, los crecientes apoyos al *paro general* del 14-D empezarán a hacer mella dentro del PSOE. Más tras comprobarse el apoyo a la jornada de movilizaciones convocada por el sector sanitario, los funcionarios y los jóvenes el jueves 24 de noviembre como paso previo a *calentar* el ambiente⁶²⁷.

extraordinarias». CCOO-UGT, “Junto podemos”, Madrid, 18 de noviembre, extraído de, ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y..., op.cit.*, pp. 219-221.

⁶¹⁹ Noticia, “Los sindicatos redactan un llamamiento conjunto ante la huelga general”, *El País*, 19 de noviembre de 1988.

⁶²⁰ Noticia “Nicolás Redondo pide al Gobierno «que recobre la cordura y la tranquilidad»”, *El País*, 16 de noviembre de 1988.

⁶²¹ Así por ejemplo Felipe González afirmaría que la UGT con tal posición habría roto unos supuestos acuerdos alcanzados aquel mismo verano en torno al documento presentado en mayo de 1988 por el PSOE. No sólo pues, también afirmaría bajo el *síndrome NHA*: «Mi experiencia es que los sindicatos no quieren entrar a discutir» y solicitando a renglón seguido «que los interlocutores sociales no pierdan el tiempo y se sienten a discutir con el Gobierno, porque el Gobierno no va ahorrar esfuerzos para ganar en eficacia, productividad y empleo». Noticia, Fernando Jáuregui, “Felipe González afirma que UGT ha roto los pactos alcanzados en el verano sobre el Plan de Empleo Juvenil”, *El País*, 17 de noviembre de 1988.

⁶²² Noticia, Enric Company, “Fraga afirma que «comprende» el paro convocado por los sindicatos”, *El País*, 22 de noviembre.

⁶²³ Noticia, Joaquín Prieto, “Fraga, Michel y Butragueño cercan a los socialistas”, *El País*, 24 de noviembre de 1988.

⁶²⁴ Véase la *nota* 429.

⁶²⁵ Véase aquí, Entrevista, “Manuel Chaves”, *El País*, 22 de noviembre de 1988.

⁶²⁶ Noticia, Juan González Ibáñez, “González participará en la campaña que prepara, el PSOE para contrarrestar la convocatoria de paro general”, *El País*, 23 de noviembre de 1988.

⁶²⁷ Noticia, Marta Zhein, “Las presiones de hoy miden la fuerza del paro, según UGT”, *El País*, 24 de noviembre de 1988; Noticia, Marta Zhein y Carmen Parra, “Funcionarios, sanitarios y estudiantes iniciaron los primeros pasos previos a la huelga general”, *El País*, 25 de noviembre de 1988; Noticia, “Los sindicatos califican de éxito la jornada de paro”, *El País*, 25 de noviembre de 1988.

De esta forma, tras la reunión de la CEF del PSOE del martes 22 de noviembre, se enviarían una serie de instrucciones a “todas las ejecutivas regionales” con el objetivo de lograr “la desactivación de la huelga”. Una *huelga* a la que, con una inusitada alegría y una desmemoria histórica considerable, se la comparaba con la huelga de Asturias de 1934. No sólo es que los sindicatos fueran unos *irresponsables* y menos que pudiera estar justificada, sino es que además “perjudica a los propios sindicatos, que entran en un camino de confrontación alejado de la realidad social que históricamente siempre ha conducido al fracaso”. No termina ahí el contenido de las *instrucciones socialistas*, pues se indicaba como el 14-D perjudicaría “los trabajadores, que ven pasar a segundo plano sus problemas inmediatos y concretos para verse implicados en una movilización genérica que no van a obtener ninguna ventaja”⁶²⁸. He aquí, un nuevo escalón más en la radicalización discursiva socialista⁶²⁹.

Cada vez más aislado –o si se prefiere auto-aislado– desde el Partido se seguiría echando *leña al horno*. En breve, se hablaría de una *guerra sucia* entre UGT y el PSOE, a partir de una serie de documentos internos que *caerían* en manos de la organización socialista⁶³⁰. Como señalaría Rubén Vega, los “conflictos [internos dentro de la familia socialista] alcanzan otra dimensión, menos íntima y más política en los niveles de dirección”⁶³¹. A partir de una intervención del Secretario General de la UGT de Madrid, José Luis Daza, el jueves 17 de noviembre, en donde hablaría que “parar Madrid es ganar la huelga”, añadiendo por lo demás: “Dos días antes de la huelga hay que conseguir que el paro esté ya realizado. Dar sensación de victoria antes del día 14. Las acciones concretas no se darán por escrito, sino de palabra, más adelante”; las mismas se instrumentalizarían por parte del PSOE para denunciar como los sindicatos emplearían la coacción y la violencia de cara al 14-D⁶³².

Poco más de un año había pasado desde la reunión del CF del PSOE del 2 de octubre de 1987. Ajenos los dirigentes socialista a una realidad social cada vez más perceptible, no faltaría la ocasión para anunciar de que “no existe en este momento en España un ambiente social predispuesto a secundar una huelga general injustificada, política y dirigida a buscar el desgaste del Gobierno”⁶³³. Y cuando resultó necesario sacarían a la luz encuestas no publicadas por el CIS, aunque, eso sí, sin citar datos o pruebas que confirmarían la existencia de la misma⁶³⁴. En paralelo, desde el propio PSOE se dramatizaría cuando no directamente se manipularía el objetivo del 14-D, al anunciar como se perseguía “erosionar la figura de Felipe González y a amargarle la presidencia europea”. A la par que se insinuaba que en caso de que España se convirtiera en un “gallinero” se podrían convocar elecciones generales anticipadas⁶³⁵. Aislados

⁶²⁸ Noticia, Joaquín Prieto y Juan González Ibáñez, “La ejecutiva del PSOE entiende que el Gobierno quedará deslegitimado si la huelga tiene éxito”, *El País*, 24 de noviembre de 1988.

⁶²⁹ Inclusive desde *El País* se reconocería esta situación: Noticia, Joaquín Prieto, “Escalada verbal del PSOE contra las centrales sindicales”, *El País*, 25 de noviembre de 1988.

⁶³⁰ Noticia, “El PSOE y la UGT se acusan de «guerra sucia» ante la huelga general”, *El País*, 27 de noviembre de 1988.

⁶³¹ VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, op.cit., p. 237.

⁶³² Noticia, Anabel Díez, “El PSOE asegura que los sindicatos recurrirán a la violencia para garantizar el éxito de la huelga”, *El País*, 27 de noviembre de 1988. E igualmente, Noticia, Joaquín Prieto, “UGT y CCOO descartan el uso de la violencia en las movilizaciones del 14 y 16 de diciembre”, *El País*, 28 de noviembre de 1988.

⁶³³ Noticia, “Chaves dice que no existe ambiente para seguir una huelga injustificada”, *El País*, 27 de noviembre de 1988.

⁶³⁴ Noticia, “Benegas habla de una encuesta según las cuales los ciudadanos rechazan la huelga”, *El País*, 30 de noviembre de 1988. Un pequeño detalle. Téngase presente que el propio Txiqui Benegas no era miembro del Ejecutivo y por lo que se conoce tampoco trabajaba o ocupaba cargo de relevancia en el CIS. Entonces, ¿de dónde sacó aquella supuesta encuesta?

⁶³⁵ Noticia, Anabel Díez, “Preocupación en el Gobierno por las consecuencias de un continuo acoso sindical”, *El País*, 28 de noviembre de 1988.

pero también debilitados, noticias como la de un diputado autonómico que dimitiría por estar en desacuerdo con la política del PSOE, no calmarían, precisamente, los caldeados ánimos socialistas⁶³⁶. ¡Y cómo! tampoco se dejaría pasar la oportunidad –aunque, en verdad expresado con muy escaso espíritu constructivo en tales circunstancias– para anunciar como desde el Gobierno como desde el Partido se estaba por la labor de negociar⁶³⁷. Asimismo no faltarían, igualmente, los intentos desesperados de parar y deslegitimar el 14-D mediante acuerdos de última hora con la derecha española y nacionalista en el Congreso⁶³⁸.

El mes de diciembre se iniciaba como había terminado noviembre. Cada día se volvía a subir un *escalón* en la campaña contra los promotores de la huelga general del 14 de diciembre, como sin con aquella *campaña del miedo* –en su versión socialista– se pudiera, en términos realistas, parar entonces el 14-D o amedrentar a unos sindicatos sabedores de lo mucho que se jugaban. Más aún, pues si algo quedaba patente es que dicha campaña que más que favorecer los intereses socialistas se estaba volviendo en su contra.

Por no contar no podía contar ni con la siempre dispuesta CEOE presente en todas y cada una de las batallas. Como ha destacado Mariano Guindal: “[La CEOE] [n]o sólo no había hecho nada para impedir el paro, sino que incluso lo alentaron. Los empresarios pensaron que la protesta no iba contra ellos, que era un ajuste de cuentas entre socialista y pagaron muy caras las consecuencias”⁶³⁹. Tal sería la situación que se generaría que partir del día 15 de diciembre, desde la patronal no se perdería ni un minuto en volver a afianzar y fortalecer la alianza con los socialistas. De esta forma, y junto con el reparto de las consabidas *instrucciones* de turno y de calificar como “injusta, antisocial, ilegítima, inoportuna e irresponsable”, poco más se haría para frenar la convocatoria. A lo suma, amenazar –y en un tono suave conociendo la trayectoria de la gran patronal española– con descontar el salario así como impedir la entrada a los sindicalistas a los centros de trabajo⁶⁴⁰.

⁶³⁶ Noticia, Xosé Hermida, “Un sindicalista gallego dimite como diputado autonómico del PSOE”, *El País*, 29 de noviembre de 1988.

⁶³⁷ Noticia, Juan González Ibáñez, “El Gabinete aun confía en negociar”, *El País*, 29 de noviembre de 1988; Noticia, Carmelo Martín, “Redondo declara que ha estado dialogando con el Gobierno hasta hace tres días”, *El País*, 29 de noviembre de 1988. Frustrada cualquier expectativa de acuerdo, una vez más, Rubén Vega cuenta como por esas fechas se produciría una importante reunión en La Moncloa, en el edificio de Presidencia del Gobierno, que se nos revela fundamental para entender no pocos movimientos posteriores, y del que, *casualmente*, la prensa no se haría eco: «El intento de coordinar una respuesta que pueda cuartear la unidad de UGT ante la huelga general tiene su momento clave a fines de noviembre, cuando se celebra en el Palacio de la Moncloa una reunión a la que asisten el secretario de Organización del PSOE y los miembros de su Ejecutiva Federal Francisco Fernández Marugán, Roberto Dorado y Guillermo Galeote, el defenestrado ex-secretario del Metal de la UGT, Antonio Puerta, la ministra de Asuntos Sociales y ex secretaria de la Federación de Químicas y Energía, Matilde Fernández, su sucesora en este cargo, Josefa Pardo, el secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra, Francisco Castañares, y el secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, junto a otros dos miembros de la dirección del sindicato minero asturiano. La determinación de desafiar abiertamente las directrices de la Ejecutiva Confederal, tratando de agudizar las contradicciones internas para frustrar la huelga, hará que el PSOE pierda casi todos los peones que le quedan en niveles de dirección de UGT. De los presentes en la reunión de Moncloa, tan sólo los dirigentes del SOMA, que observan una más productiva actitud de resistencia pasiva, escapan a las sanciones y conservan sus cargos en el sindicato». VEGA, Rubén, *La reconstrucción de...*, *op.cit.*, p. 238.

⁶³⁸ Noticia, Javier Ayuso, “Fallido intento de socialistas, centro y derecha para evitar la huelga”, *El País*, 1 de diciembre de 1988.

⁶³⁹ GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, p. 310.

⁶⁴⁰ Noticia, Javier Ayuso, “La CEOE pretende que se descuente el salario del día 14”, *El País*, 30 de noviembre de 1988; Noticia, Javier Ayuso, “Las empresas no dejarán entrar a los huelguistas”, *El País*, 1 de diciembre de 1988. En términos comparativos, el Círculo de Empresarios llegaría a mostrarse más combativo. «[E]ste Círculo estima que la motivación de la anunciada huelga general no puede ser sino de índole política [...]. Ningún observador imparcial de nuestra evolución económica y política

En esta suma de *desdichas*, además, de las noticias relacionadas con el sustancial incremento de la contratación temporal o el raquítico descenso del desempleo⁶⁴¹, se sumaría un gradual cambio de posiciones en lo que respectaba a la tercera pata del *tridente* en pos del proyecto socialista: *El País*. Cuando todavía tenía a *gala* acompañar su edición con el título de “Diario independiente de la mañana”, y por más que empleara el encabezado de las noticias relacionadas con el 14-D con la siguiente expresión: “Movilización contra el Gobierno”; poco a poco iría limando su posición frentista contra los sindicatos.

Después de los editoriales del 14 y 19 de noviembre, el jueves 1 de diciembre publicaría su tercer editorial relacionado con el paro general. De entrada, criticaría los muchos errores de los socialistas al evocar una dialéctica en términos *frentistas* y anunciar, en la práctica, la posible llegada del apocalipsis si triunfa el 14-D:

«Como quien despierta de un sueño, el Gobierno ha descubierto que no es tan amado como cree merecer. Algunas de sus reacciones ante la convocatoria del día 14, trasladadas luego a la dirección del partido que le sostiene, han contribuido a dramatizar la situación en medida muy superior a lo que la realidad –y la prudencia política– aconsejan. Afirmaciones como que es la legitimidad del Gobierno democrático la que está en cuestión, evocaciones de la huelga revolucionaria de 1934, referencias al carácter inevitablemente violento que adquirirá la movilización, otorgan al llamamiento de los sindicatos unas resonancias épicas de las que inicialmente carecía».

Puestos a la tarea, inclusive rectificaría –parcialmente– aquel siempre comentado primer editorial cuando denunciaría la legitimidad de *lo político*, en relación a la decisión sindical de convocar la futura huelga:

«Tampoco se entiende bien la obsesión de los sindicatos por negar que haya un objetivo político en su desafío. Lo hay, ¿pero dónde está escrito que la política sea cosa vedada a aquellos a los que, en la división de tareas acordadas en Suresnes o donde sea, se les asignó la parcela sindical?».

Un duro editorial que terminaría reclamando al Gobierno que negociará a la par que estuviera por la labor de ceder llegado el caso.

«Un Gobierno democrático ha de responder a demandas más generales que las de la base social que le apoya, pero la participación de esta base, a través de sus asociaciones, en la definición de las prioridades es decisiva para la viabilidad misma del proyecto. Negociar significa estar dispuesto a ceder, y no simplemente a convencer al interlocutor»⁶⁴².

La dura realidad se iba imponiendo, paso a paso, más allá de las *salidas de tono* o la encuestas prefabricadas y no publicadas que avisaban (presuntamente) que no existía ambiente para un paro general, o que los ciudadanos pensaban ejercer masivamente su *derecho al trabajo* el miércoles 14.

Las multitudinarias marchas que se celebrarían el propio jueves 1 de diciembre y que terminarían con una enorme manifestación en Madrid por parte de decenas de miles de jóvenes,

encontraría en nuestra actual situación argumentos objetivos en apoyo a la huelga convocada. Y, sin embargo, el daño que esa movilización puede causar a nuestra economía, incluidos los intereses que deberían defender quienes la propician, va a ser sin duda de proporciones muy importantes y objetivamente medibles». Para concluir: «Desde luego que cabe pensar en situaciones extremas en las que un país democrático debe responder con propuestas de movilización colectiva. En la que ahora estamos viviendo, convocar una huelga general es un ejercicio de inconsecuencia, que no tiene argumentos mínimamente sostenibles y que sacrifica muchos esfuerzos honestos sólo en aras de ciertos intereses políticos». AHFFLC, Círculo de Empresarios, “Comunicado del Círculo de Empresarios ante la convocatoria de huelga general”, Madrid, 2 de diciembre de 1988, sig. AI 323.

⁶⁴¹ Noticia, “Los contratos temporales se elevaron en 216.500, mientras que los fijos bajaron en el tercer trimestre”, *El País*, 1 de diciembre de 1988; Noticia, “UGT y Comisiones Obreras denuncian la precarización del empleo en los proyectos recién aprobados por la Administración”, *El País*, 1 de diciembre de 1988.

⁶⁴² Editorial, “La guerra del 14”, *El País*, 1 de diciembre de 1988.

constituyó un primer y serio aviso del posible éxito del 14-D⁶⁴³. Hasta el mismísimo Felipe González, siempre pragmático a la par que realista, sería consciente de cómo a partir de entonces no era viable *desconvocar* la huelga, aunque al mismo tiempo siguiera obstinado en su negativa a abrir canales de negociación⁶⁴⁴.

Desconcertados y cada vez más nerviosos tanto desde el Partido como del Gobierno, el 14-D se tornaría en un asunto personal. En una estrategia que ya habían puesto a prueba a lo largo de 1983 y 1984 contra CCOO y concretamente contra Marcelino de Camacho –sin resultados prácticos a la hora de la verdad– se iba a tratar ahora de repetir la misma⁶⁴⁵. Así pues, buscarían de dividir y enfrentar a nivel interno al antes sindicato hermano con todas las artimañas posible. Todo ello con la desinteresada colaboración de *El País*.

Conscientes de aquella situación y de lo que se jugaban, desde UGT, con Antón Saracíbar a la cabeza, empezaría una serie de destituciones de dirigentes ugetistas –principalmente procedentes de la federación de Químicas o de la Federación de Trabajadores de la Tierra– quienes se oponían a la convocatoria y además calificarían de *irresponsable* cuando no de *loco* al propio Redondo⁶⁴⁶. El mismo Saracíbar denunciaría como “le consta que el Gobierno y el PSOE intentan desestabilizar el sindicato mediante presiones sobre sus dirigentes para que hagan publica su oposición a la huelga general”⁶⁴⁷.

Desde la UGT se publicaría un clarificador comunicado el propio 3 de diciembre de 1988 –conocedores entonces ya de la reunión que altos cuadros socialistas y de una serie de dirigentes de la central ugetista *disidente*, habían mantenido hacía unos días en La Moncloa⁶⁴⁸– en relación a toda una serie de declaraciones de Matilde Fernández y Alfonso Guerra⁶⁴⁹. De los seis puntos del mismo, tres son aclaratorios de la tensión que se vivía:

«1.- La UGT quiere denunciar el cinismo que están demostrando miembros destacados del Gobierno, entre ellos el Vicepresidente y la Ministra de Asuntos Sociales [...], al indicar que la convocatoria del paro está trayendo como consecuencia la división interna de UGT, cuando desde el propio Gobierno y personas cercanas al propio Vicepresidente están siendo los impulsores de esta agresión a un sindicato de clase y por tanto agradeciendo a su propia base social, que son los trabajadores.

[...].

3.-Nuevamente la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha tenido que hacer frente a una maniobra pueril y burda cuyo único objetivo es ocultar las deficiencias de la política económica del Gobierno y las razones que los sindicatos tienen para celebrar movilizaciones generales que culminan con el paro del día 14.

⁶⁴³ Noticia, “Decenas de miles de jóvenes se manifiestan contra el plan de empleo”, *El País*, 2 de diciembre de 1988.

⁶⁴⁴ Noticia, Ignacio Cembrero, “González descarta que «sea posible desconvocar» la huelga del día 14”, *El País*, 2 de diciembre de 1988.

⁶⁴⁵ Véase la nota 429.

⁶⁴⁶ Noticia, “UGT destituye a nueve dirigentes por echarse atrás en su apoyo a la huelga”, *El País*, 3 de diciembre de 1988.

⁶⁴⁷ Noticia, Carmen Parra, “UGT acusa al Gobierno y al PSOE de intentar desestabilizar el sindicato”, *El País*, 3 de diciembre de 1988.

⁶⁴⁸ Véase la nota 637.

⁶⁴⁹ Noticia, Menchu Illan, “Matilde Fernández reclama a UGT que sea «respetuosa con el pluralismo ideológico»”, *El País*, 9 de diciembre de 1988; y, un días antes Alfonso Guerra afirmaría como «en el caso de someterse a referéndum el Plan de Empleo Juvenil, el 90% de los votantes lo harían a favor. Asimismo, el número dos del PSOE señaló que hay un grupo de ugetistas que defienden la política tradicional de la UGT, que es la concertación y el diálogo». Noticia, “CCOO afirma que el Gobierno ha recortado las subvenciones que reciben para formación profesional”, *El País*, 8 de diciembre de 1989.

4. Es vergonzoso para la UGT las presiones que se efectúan a personas estrechamente vinculadas con cargos políticos encaminadas a servir de esquirols contra los trabajadores y ciudadanos»⁶⁵⁰.

La estrategia de ataque basada en lo *personal* pronto evidenciaría sus límites cuando no su fracaso. Una muy particular *batalla* que como remarcaría Antonio Gutiérrez estaba conduciendo a lo siguiente:

«Sí, obedece a una estrategia premeditada del PSOE, que pretende desnaturalizar el verdadero alcance del descontento social, queriendo dar la impresión que todo se limita a una pelea familiar y más en concreto entre personas relevantes de esa familia. Pero hasta en eso se equivocan, lo que han conseguido no es lo que perseguían, provocar desgarrs en los sindicatos y en la UGT. Lo que han logrado es una mayor unidad en las dos centrales»⁶⁵¹.

A falta de no más de diez días para el 14 de diciembre, tanto desde el PSOE como desde el Ejecutivo, utilizarían sus últimas bazas para evitar lo que parecía inevitable. No faltarían aquí, por ejemplo, cartas desde la dirección socialista, con Ramón Rubial a la cabeza, para solicitar a Redondo una reflexión de cara a “desvincularse de la huelga política que desde CCOO [...] pretenden erosionar el proyecto político común de ambas organizaciones”. Téngase aquí muy presente la larga entre ambos dirigentes socialistas proveniente de la lucha antifranquista. Una misiva que evidenciaba lo lejos que se hallaba el PSOE de la realidad social viva. Lógicamente, la misma no tendría efecto alguno⁶⁵².

Y como había sucedido durante el I Trimestre de 1984 en plena oleada conflictiva obrera por la crisis económica y la reconversión industrial, o tiempo más tarde durante el traumático referéndum de la OTAN en abril de 1985; Felipe González se pondría al frente de su *particular guerra* contra la convocatoria del 14-D. Sabedores de sus límites e insuficiencias internas, por más que la organización socialista contara con decenas de miles de afiliados –antes que militantes– de cientos de cuadros preparados así como decenas de cargos públicos dispuestos a dar la batalla, no quedaría más remedio que *tirar* de su más importante patrimonio político: el Presidente y Secretario General. Se perseguiría, pues, con aquella *carismática* presencia *suavizar* las posibles consecuencias del 14-D ante la más que constatables muestras de apoyo social a la convocatoria. Limitar en la medida de lo posible el desgaste político también formaría parte, en adelante, de la cambiante agenda política socialista, en donde lo único que a lo que no se estaba dispuesto a renunciar era a su propia política económica.

Y que mejor tribuna para tales labores propagandísticas que una entrevista a doble página en *El País*, un domingo 4 de diciembre. La monotonía discursiva socialista volvería a hacerse patente. González se reafirmaría en todos y cada una de las anteriores posiciones, para a continuación lanzar una serie de mensajes. Primero: “La legitimación o la no legitimación me la van a dar los ciudadanos en las urnas, cuando corresponda; no está en mis cálculos adelantar los comicios”. Segundo, todo un clásico, la *llamada al diálogo social*, tal y como venía sucediendo en cada una de sus intervenciones desde 1982, aunque se intuía un todavía menor voluntarismo político. Eso sí, *diálogo* siempre y cuando la huelga fuera pacífica y se moviera “en los límites del respecto al Estado de Derecho y a la legalidad, a la libertad de los ciudadanos”. En tercer término, no desaprovecharía para *lanzar* una nueva descalificación a los sindicatos, al interrogarse si los mismos querían ser *uropeos* o *argentinos*. Y en cuarto lugar, tras defender el

⁶⁵⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Un fracaso la burda operación de desestabilización”, Madrid, 3 de diciembre de 1988 [localizado en, AHFFLC, UGT-CEC, “6º Comité Confederal ordinario celebrado en Madrid el 24 y 25 de abril de 1989”, sig.ant. A/38/19].

⁶⁵¹ Entrevista, “Antonio Gutiérrez”, *El País*, 1 de diciembre de 1988. Tesis que mantendría uno de los principales interesados tiempo después: «Se equivocaban quienes quisieron encontrar diferencias entre el gobierno y UGT en razones de oposición política, razones personales, ansias de poder o una supuesta estrategia de diferenciación. Las discrepancias, cuando se produjeron, fueron el producto de diferencias reales y el resultado de distintas concepciones sociales». Nicolás Redondo en declaraciones a, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, op.cit., p. 167.

⁶⁵² VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, op.cit., pp. 239-240.

carácter progresista y social de sus políticas, afirmar que no modificaría su política económica, a no ser que le convencieran en un futuro intercambio de opiniones, lo que, en verdad, parecía poco probable conociendo su trayectoria política y su *fe* personal en sí mismo⁶⁵³.

El propio González se involucraría a fondo en la campaña socialista. Una operación política que en su *recta final* terminaría por ascender el último escalón en relación al proceso de agresión y descalificaciones contra los sindicatos. La particular *guerra sucia* entre UGT y la familia socialista llegaría a su momento culmen. Así, por ejemplo, Solchaga hablaría de la necesidad de “cambiar personas” que dirigían a la propia UGT, en un nuevo intento de desestabilización pero asimismo de evidente intromisión. Para completar aquellas llamadas al *entendimiento*, después de calificar a la dirigente ugetista de simples “burócratas”, se alegraría de cómo los mismos “no son particularmente rojos”. Más todavía, pues, manifestaría el señor Ministro de Economía como “bajo la excusa de un giro social, lo único que se oculta es un problema de lucha de poder, una lucha de los sindicatos por obtener un poder político”⁶⁵⁴.

A todo lo anterior, mientras que nuevas ejecutivas de UGT eran destituidas –entre otras, las de Sevilla y Jaén⁶⁵⁵– se filtraba a la prensa como desde el Gobierno se estaban prometiendo *cargos* a los *disidentes* a partir del 15 de diciembre⁶⁵⁶. De este modo, la ofensiva final que desata en la última semana y media es, sencillamente, brutal. Veamos algunos episodios. La CEOE, por un lado, alentaba a su manera a *parar* la huelga a la que consideraba de *dudosa legalidad*, y, por otro, el Gobierno decretaba duros servicios mínimos⁶⁵⁷. De hecho, tal vía, en la práctica, era su único recurso jurídico-político válido para desactivar, en la medida de lo posible, el futuro éxito de la huelga general. A lo que se añadiría, en un tiempo en que las denuncias tanto de *corrupción política* como de no pocos impunes abusos –sin olvidarnos de los GAL– ocupaban de forma cada vez más frecuente los titulares de los periódicos, las denuncia que desde UGT se haría en relación al *uso* de dinero público para financiar la campaña socialista a favor del PEJ. El propio Nicolás Redondo afirmaría al respecto de los *disidentes* ugetistas: “Se va a ver muy mal esa gente. Tendrán que explicar de dónde sale el dinero que están gastando en aviones, viajes y alquiler de hoteles. Quizás lo estén pagando los ciudadanos”⁶⁵⁸. Una durísima acusación que causaría un muy llamativo silencio entre las filas socialistas. Una *sospecha* en torno a la utilización a conveniencia del dinero público que también denunciaría Comisiones Obreras, cuando aseguraría que se había dado la orden desde el Ministerio de Trabajo de no “entregar al sindicato los 350 millones de pesetas dedicados a cursos de formación profesional comprometidos a principios de año”⁶⁵⁹.

Con cada vez menor margen para la reacción, por más que asegurara por activa y por pasiva que la huelga no iba a ser un éxito –aunque ya entonces se evitaría el empleo del vocablo *fracaso*– se irían sumando a la *causa sindical* desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) –

⁶⁵³ Entrevista, “Felipe González”, *El País Domingo*, 4 de diciembre de 1988; Noticia, “Felipe González se suma esta semana a la campaña contra la huelga”, *El País*, 5 de diciembre de 1988.

⁶⁵⁴ Noticia, Antonio Caño, “Solchaga cree que cambiar la dirección de UGT favorecería la armonía con el Gobierno”, *El País*, 4 de diciembre de 1988.

⁶⁵⁵ Noticia, “Destituidas las ejecutivas de UGT de Sevilla y Jaén por no apoyar el paro del día 14”, *El País*, 4 de diciembre de 1988. Consúltase también, Noticia, Pedro Jara, “Un centenar de cargos ugetistas disidentes se reunirá el próximo lunes en Madrid”, *El País*, 10 de diciembre de 1988.

⁶⁵⁶ Noticia, “Antonio Gutiérrez dice que se prometen cargos para impedir la huelga”, *El País*, 4 de diciembre de 1988.

⁶⁵⁷ Noticia, “Los sindicatos se niegan a cumplir los servicios mínimos impuestos”, *El País*, 11 de diciembre de 1988.

⁶⁵⁸ Noticia, Carmen Parra, “Redondo insinúa que se está pagando con dinero público la campaña contra su sindicato”, *El País*, 11 de diciembre de 1988.

⁶⁵⁹ Noticia, “CCOO afirma que el Gobierno ha recortado las subvenciones que reciben para formación profesional”, *El País*, 8 de diciembre de 1988.

quien se mostraría comprensivo con las demandas relativas al 14-D en un momento de movilizaciones propias en pos de mejoras laborales⁶⁶⁰—hasta los propia Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) —quienes declararían: “Por tanto, al ser también trabajadores por cuenta ajena se solidarizan con la postura expuesta por los sindicatos”⁶⁶¹— entre otras decenas de movimientos sociales, incluidos el mundo de la cultura. Hasta el propio Jefe de Estado, Juan Carlos I, se vería obligado a llamar a la concordia y al entendimiento con mensaje incluido para el Gobierno en el 10º aniversario de la Constitución: “Nada sería tan doloroso como percibir que el Estado —que debe ser austero y ejemplar en sus comportamientos— pueda dejar de cumplir sus fines al servicio de la sociedad por una falta de entendimiento de sus propias instituciones”⁶⁶².

Que el desastre se avenía a toda prisa se ejemplificaría con el anuncio de la enésima *oferta de negociación* que lanzaría el propio Felipe González a nivel institucional —un 5 de diciembre— quien, por otro lado, no tenía inconveniente en seguir azuzando contra el movimiento sindical a través de la campaña del PSOE. En cualquier caso, aquel mensaje leído con la necesaria atención, serviría, antes que nada para guardar las formas y tratar de mejorar una dañada imagen gubernamental. Así más que contener un verdadero deseo de enderezar el alterado estado de cosas transcurría por el terreno de los hechos y declaraciones previamente conocidas. Sin moverse ni un punto ni una coma de lo que venía repitiendo desde hacía un mes largo, a la par que llamaría al *diálogo* —concepto que nunca terminaría por asociarse a *modernización*— resaltaba que no estaba por la labor ni antes ni después del 14 de diciembre, de ceder al chantaje sindical. Pero también en un gesto de delicada sutileza, denunciaba el descredito alcanzado por la dirección de la UGT quien había errado el rumbo⁶⁶³. A partir de dicha llamada al *diálogo*, lo más suave que se oiría como contestación sería que se habían tratado de unas declaraciones “lastimosas”, y que con las mismas formas de proceder se pretendía “romper las reglas del sistema democrático de nuestra sociedad”⁶⁶⁴.

Los últimos días previos al 14-D continuarían por los senderos hasta entonces transitados. El sábado 10 de diciembre uno de los mayores impulsores de la campaña socialista, José María Benegas, publicaba un larguísimo artículo en *El País*, en donde mostraba su estupefacción por lo que estaba aconteciendo en todo un ejemplo de cinismo político, prácticamente, sin paragón: “No alcanzo a entender por qué se convoca una huelga general en España. Toda huelga general es siempre una huelga política”: “El análisis del deshago nacional no puede conducir a eximir de su responsabilidad a los dirigentes sindicales”; “Esta huelga no tiene ningún sentido”; o, “Lo peor de esta huelga es que es inútil”. Estas y otras frases escribirían el número 3 del PSOE como corolario de toda una suma de declaraciones efectuadas durante las semanas anteriores⁶⁶⁵. Y, no por ello, el lunes 12 declararía a la Agencia EFE: “Creo que UGT debería desconvocar la huelga y sentarse el mismo lunes [...] a negociar con el presente del Gobierno los aspectos de la política económica y social que quieran”⁶⁶⁶. Tan *quemado* políticamente estaba el propio Benegas que sería rechazado al unísono por UGT como

⁶⁶⁰ Noticia, “El SUP, sindicato policial”, *El País*, 3 de diciembre de 1988.

⁶⁶¹ Noticia, “Los futbolistas secundarán la huelga general”, *El País*, 6 de diciembre de 1988

⁶⁶² Noticia, Anabel Díez, “El Rey llama al entendimiento a las instituciones y los poderes para servir a la sociedad”, *El País*, 7 de diciembre de 1988.

⁶⁶³ Noticia, Anabel Díez, “Felipe González hará una oferta de negociación a los sindicatos durante una conferencia de prensa”, *El País*, 5 de diciembre de 1988; Noticia, “Duro rechazo sindical a la declaración de Felipe González sobre la huelga”, *El País*, 6 de diciembre de 1988.

⁶⁶⁴ Noticia, “El sindicato socialista califica de «lastimosas» las declaraciones”, *El País*, 6 de diciembre de 1988.

⁶⁶⁵ BENEGAS, José Mª, “¿Y después, que?”, *El País*, 10 de diciembre de 1988.

⁶⁶⁶ Noticia, “Ofensiva general del PSOE en un intento final de parar la huelga”, *El País*, 12 de diciembre de 1988.

por CCOO como un posible intermediario, y cuyo llamamiento se catalogaría como de un simple gesto “cosmético” a la galería⁶⁶⁷.

Tampoco faltaría en los últimos momentos otra de las siempre aludidas acusaciones, que con mayor o menor entusiasmo, se habían empleado previamente. Pues más allá de que UGT hubiera caído bajo la órbita del comunismo, para Alejandro Cercas, entonces Secretario Federal de Participación Ciudadana del PSOE, el 14-D se presentaba como una batalla en donde “van a morir UGT o el PSOE y en la que vencerán el partido comunista y Comisiones Obreras”. El *viejo fantasma* del anticomunismo socialista volvía a resonar⁶⁶⁸. Por su parte, también Felipe González pondría su *granito de arena*: indicaría a menos de 48 horas como la gran perjudicada del 14-D sería la *imagen de España*⁶⁶⁹.

Por su parte, desde el Ministerio de Interior se prepararía a conciencia el día, y se anunciaría como 54.824 agentes, a saber la práctica totalidad de la plantilla de la Policía Nacional, saldrían a defender el *derecho del trabajo*. Ello, junto con instrucciones precisas a los gobernadores civiles de que en cada calle hubiera presencia policial. Como se avisaba que desde la Comisaría General de Información se había trabajado para detectar y anular a *grupos marginales* violentos. Pero ni dentro de la Policía la unanimidad sería la nota dominante. De nuevo, el SUP mostraría su “solidaridad con las justas demandas de las centrales sindicales”, y alegaban que no podían sumarse a la huelga ya la “ley nos lo prohíbe tajantemente”, aunque anunciaban su participación en las manifestaciones previstas para el viernes 16 de diciembre⁶⁷⁰.

En su singular *ir y venir* el Grupo PRISA, a través de su principal diario, *El País*, publicaría un llamativo editorial el martes 13 de diciembre —el cuarto en concreto desde la convocatoria del 14-D— cuando ya se conocía que sus trabajadores habían votado en asamblea ir a la huelga⁶⁷¹. La posible lectura de ese editorial resultaba del todo patente: la equivalencia, aunque siempre escorada hacia el poder político. *Equivalencia* que, en buena medida, era el resultado de una lectura de la realidad política y social que se podía detectar sin menor problema a menos de 24 horas del 14-D. De esta forma, comenzaba mencionando el gran error estratégico que había supuesto la campaña del PSOE, en un inusual tono crítico contra los propios socialistas: “El Gobierno y el PSOE han llamado a la movilización a los ciudadanos, casi más que en defensa de esa política, contra los sindicatos, o al menos contra los intentos de estos por parte de éstos de determinar la actuación del Ejecutivo”. No obstante, en el reparto de culpas todos tenían su parte:

«A riesgo de simplificar, puede decirse que las reivindicaciones concretas de los sindicatos en materia de pensiones, salarios de los funcionarios, cobertura del desempleo, etcétera resultan legítimas, razonables, incluso, merecedoras de discusión en cualquier caso, pero que no han sido debidamente articuladas por falta de una estrategia sindical coherente. Con el mismo énfasis se debe afirmar que la política económica del Gobierno es genéricamente acertada, pero su despliegue ha resultado mal encajado en un proyecto global. Las dos conclusiones llevan a la misma lógica: Gobierno y sindicatos han fallado en el mismo terreno, en

⁶⁶⁷ Noticia, “Las centrales rechazan al intermediario”, *El País*, 12 de diciembre de 1988. En este sentido, no deje de leerse las posteriores reflexiones al respecto de uno de *nuestros protagonistas* más destacados: BENEGAS, José M^a, *La razón socialista: cara abierta a los socialistas españoles*, 2^a ed., Barcelona, Planeta, 1990.

⁶⁶⁸ Noticia, Carmelo Martín, “El día 14 morirá el sindicato o el partido socialista, según Alejandro Cercas”, *El País*, 12 de diciembre de 1988.

⁶⁶⁹ Noticia, “Felipe González asegura que saldrá perjudicada la imagen de España”, *El País*, 13 de diciembre de 1988.

⁶⁷⁰ Noticia, Juan José Echevarría, “Interior establece oficinas especiales para denunciar piquetes violentos alteraciones de la seguridad”, *El País*, 13 de diciembre de 1988.

⁶⁷¹ Noticia, “Los trabajadores de EL PAÍS votaron el apoyo a la huelga”, *El País*, 13 de diciembre de 1988.

el de la política, entendida ésta como modulación de unos medios en función de determinados fines socialmente deseables».

Pero el editorialista de *El País* en dicha ocasión querría dar un paso más. En concreto, el de plantear un análisis de corte político-histórico desde la llegada de los socialistas al poder, a través de los éxitos y fracasos del siempre mencionado *proyecto socialdemócrata* –sin más adjetivos–. El punto de partida de tal editorial lo constituiría la defensa de cómo el modelo elegido por el socialismo español en modo alguno podía asemejarse ni menos compararse con el modelo neoliberal anglosajón. Se recordaba allí, además, que tras la salida del XXXI Congreso del PSOE en enero de 1988, el Partido saldría con tres grandes promesas: un mayor gasto social, *gobernar de otra manera* y fortalecer la *ética socialista* así como perseguir determinados “comportamientos individuales y sociales de los gobernantes”. Y resaltaba a partir de ahí, en una lectura cuando menos discutible, que si bien la primera promesa había sido cumplida a grandes rasgos, las otras dos no.

El editorialista –probablemente el mismo que escribiera los tres anteriores editoriales– volvería a repetir con similares cuando no iguales palabras, las pertinentes críticas, que en cualquier caso, transitaban por la senda de lo políticamente correcto. “El consenso con la sociedad se ha quedado en el soliloquio de un Gobierno cuyo principal mensaje ha consistido en proclamar sus éxitos macroeconómicos y la incompetencia de quienes no han compartido su entusiasmo”. Todo ello con crítica incluida por su empeño en defender a *capa y espada* que el mantenimiento de tales propuestas, y citamos literalmente, fueran “las únicas razonables y viables en las presentes circunstancias”. Puesto a sembrar las *dudas* sobre aquella forma de gobernar se indicaba: “Por otra parte, no es creíble que el fracaso en *todas* las mesas de concertación deba atribuirse a la intransigencia sindical”.

No concluía ahí. Tras criticar la “pérdida de perspectiva sobre el papel de las asociaciones intermedias de la articulación social”, por parte de los socialistas; un pequeño arrebató radical le haría advertir a *El País* como los “que siempre mandaron y controlaron seguirán mandado y controlando a través de similares redes de influencia”, en clara alusión a la falta de un proyecto reformista profundo que hubiera tenido por fin real modificar las estructuras de poder.

Lo más grave, a su juicio, se daba en el terreno de los comportamientos públicos, que “ya apenas provoca escándalo en las filas socialistas”. Al silencio político sobre la *cultura del pelotazo*, se añadía la grave sospecha de su alianza con los “especuladores de guante blanco [que] gozan de la confidencialidad de los tecnócratas, con los que con frecuencia comparten gustos y escenarios sociales”. Más allá de quien o quienes se pudieran sentir *aludidos*, quedaba patente el “desconcierto de unos sectores genéricamente identificados con el Gobierno pero que observan una clara asimetría en la receptividad del poder político ante sus propias demandas y las de los poderosos”.

En esta situación, y por más que no se dejarán de citar los errores de los sindicatos así como se reseñarán sus debilidades, el Gobierno tendría que cargar con el *error* de no haber frenado la convocatoria de la huelga general. Un Ejecutivo cuya estrategia había radicalizado un conflicto, que puesto en marcha se había terminado por transformar en un conflicto social generalizado. Un hecho histórico que apenas tenía antecedentes. En conclusión:

«Todo ello enfrenta a las dos partes hoy en conflicto –que se sienten sitiadas, como en dos alcázares de Toledo– a la realidad de una huelga desmesurada, cuyos resultados pueden ser insólitos: los vencidos, vencidos, y los vencedores, perdidos»⁶⁷².

A las 00.01 horas del 14 de diciembre la huelga ya era un éxito sin precedentes. El Comité de Huelga de TVE había preparado meticulosamente el magno acontecimiento. En conexión con todos los centros de TVE pero también de RNE, son sede en Torrespaña, los trabajadores incluso prepararían una cuenta atrás partiendo de 10 hasta 0 de cara a cortar todo

⁶⁷² Editorial, “Los vencidos, vencidos, los vencedores, perdidos”, *El País*, 13 de diciembre de 1984.

tipo de emisiones. Y, efectivamente, los trabajadores y técnicos del repetidor de la Bola del Mundo –el nombre del principal protagonista de tal *gesta* es José María Galindo⁶⁷³– en la madrileña sierra de Navacerrada, cortaron la emisión. Hasta allí llegó la emisión de la televisión pública. Un *corte* que conllevaría, asimismo, la primera víctima del 14-D, Pilar Miró, ya seriamente debilitada, primero, por las frecuentes discrepancias políticas con el Gobierno –en un inusual rasgo de independencia periodística– y segundo por la publicación en la prensa de sus desmedidos gastos de protocolo⁶⁷⁴.

Un *apagón* que iría mucho más allá. Aunque es tremendamente complicado adentrarse en las *otras consecuencias* de aquel corte, no puede descartarse su *efecto psicológico* en amplios extractos de la sociedad, en un tiempo en que la televisión pública era el único canal. De hecho, nos atreveríamos a afirmar –a falta de posibles fuentes de primera mano, que tan sólo podrían ser suplidas a través de la elaboración de un posible trabajo cualitativo en base a una amplia recogida de testimonios orales– que tal corte televisivo tendría tanto o más importancia que el mismo trabajo sindical desarrollado en los meses previos, o puestos al caso, que los desaciertos que acompañarían a la campaña del PSOE a favor del PEJ. La TVE de entonces era el principal medio de comunicación de una nación cuyas posibilidades de acceder a otros formatos de información y de contrainformación eran extremadamente limitadas. En la España de 1988, sin prácticamente ningún género de dudas, el *botón* que pulsaría José María Galindo será el factor desencadenante como determinante del éxito de la huelga del 14 de diciembre de 1988.

Por lo demás, la inmensa mayoría de los trabajadores de la nación pararían por propia voluntad, cuando no por convencimiento propio⁶⁷⁵. Desde los principales centros industriales, pasando por la inmensa mayoría de los centros de trabajo, las grandes superficies y medianos y

⁶⁷³ No faltarían en aquellos días y siguientes semanas las muestras de solidaridad con el propio José María Galindo así con el resto de sus compañeros: «Vaya desde estas páginas una muestra de respeto y admiración hacia los compañeros que, aun poniendo en peligro sus puestos de trabajo, hicieron posible que el paro fuera una realidad en Televisión Española, al igual que sucedió en muchos otros centros de trabajo de nuestro país». “TVE deja de emitir por primera vez en España”, *Unión*, nº 105, (1989), p. 8.

⁶⁷⁴ Sobre su ya deteriorada posición ‘política’ al frente de TVE en dichas fechas, véase el relato que proporcionó en su día, PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González...*, *op.cit.*, pp. 343-344. Por lo demás, mucho se ha discutido sobre tu actitud y toma de posición frente al 14-D. Guerra afirma en sus memorias que se había hablado y negociado con la interesada de cara a evitar, tal y como se había filtrado, que se cometiera un *sabotaje* en las instalaciones de la Bola del Mundo en Navacerrada: «Me comunicó [el presidente Felipe González] que la directora general, Pilar Miró, le había garantizado que junto al aparato en cuestión apostaría a dos personas de su entera confianza, y si fuera necesario estaría ella misma, para impedir que una sola persona tomara la iniciativa de sabotear las emisiones». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, *op.cit.*, pp. 328-329. Por su parte, Mariano Guindal alimentó la siguiente hipótesis: «La directora general de TVE Pilar Miró fue informada debidamente del sabotaje que estaban planificando los sindicatos y aseguró al presidente del Gobierno que lo evitaría, pero por una u otra razón no lo consiguió. Pocos días más tarde fue cesada en su cargo».

⁶⁷⁵ Véase, en primer término, los espectaculares datos recogidos en la tabla “10.Datos del paro en las grandes empresas” en ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y...*, *op.cit.*, pp. 224-228. Asimismo, y de cara a medir el apoyo ciudadano y las posteriores reacciones, el CIS publicaría tres estudios a partir de donde se puede confirmar –por más que nunca faltará la fundada *sospecha* de su maquillaje previo paso cocina del Gabinete de Presidencia– el éxito y apoyo social al 14-D: CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, *Barómetro enero 1989*, Estudio nº 1785, 1989; id. *Debate parlamentario sobre el Estado de la Nación (VI)*, Estudio nº 1793, 1989; id. *Actitud y opiniones de los jóvenes*, Estudio nº 1813, 1989. Ya a mediados de 1988 el CIS había publicado también dos encuestas altamente relevadoras: id., *Actitudes y demandas sindicales de los trabajadores españoles: discurso social ante el sindicalismo*, Estudio nº 1771, 1988; y, de forma concreta y específica: id., *Actitudes y opiniones de los españoles ante el Plan de Empleo Juvenil*, Estudio nº 1756, 1988, publicado en junio de aquel mismo año. Véase, al respecto de esta última encuesta la lectura que realizaría, ESPINA, Álvaro, “El reto de la integración laboral de la generación del *Baby Boom*” en *Empleo, democracia y...*, *op.cit.*, p. 214; y desde otra perspectiva el también análisis específico de, CERVIÑO, Emma, *Políticas de representación...*, *op.cit.*, pp. 218-ss.

pequeños comercios, los transportes, la mayor parte de los servicios básicos, los espectáculos del mundo de la cultura hasta el mundo del fútbol, certificaron los alcances cuantitativos a la par que cualitativos del 14-D⁶⁷⁶. Tan sólo resistiría la embestida, y no completamente, los centros comerciales de El Corte Inglés. Precisamente, en sus puertas se producirían los momentos más tensos en una jornada de paro general que transcurriría sin grandes incidentes. Un miércoles en donde la imagen más frecuente sería la de un día festivo, sin apenas tráfico y las calles vacías como se reportó en la mayor parte de los medios de comunicación al día siguiente, pues también, la prensa pararía de forma mayoritaria y todavía más la distribución de la misma⁶⁷⁷.

Las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar el miércoles 14 en ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla⁶⁷⁸, sumadas a la histórica del viernes 16 en Madrid, cerrarían aquella huelga general del 14 de diciembre⁶⁷⁹. Todo un éxito –palabra tantas veces repetida en estas páginas, pero que no deja de ser el término más correcto en castellano para definir el transcurrir del mismo 14-D– del movimiento sindical a la par que de los propios los movimientos sociales. Eso sí, pacería tremendamente difícil que pudiera volver a repetirse las dimensiones de aquella convocatoria. Empezando, por el hecho, de que, en breve, comenzarían a emitir canales privados televisivos. Por lo demás, demasiados *burdos errores* se habían cometido para volver a caer en los mismos.

Una historia, por lo demás, bien conocida y no pocas veces recordada, aunque la bibliografía específica no haya abundado sobre tal episodio histórico y todavía hoy no se pueda citar un estudio de caso de referencia⁶⁸⁰. Una huelga general, en conclusión, que supondría la más importante derrota histórica de los ejecutivos socialistas durante todo su periodo de gobierno.

En el terreno de las interpretaciones, y alejados de los relatos oficiales o historiográficamente *amables*, bien desde una perspectiva liberal-conservadora o progresista-liberal, lo cierto, es que el 14-D sería la última gran expresión de *solidaridad de clase* en la España del tiempo vivido. Se cerraba así una larga década de fuertes movilizaciones obreras, nacidas al calor de la final de la dictadura y los primeros años de la transición posfranquista. No más *éxitos* del movimiento sindical con las correspondientes *victorias* se pueden narrar en los siguientes lustros.

De cualquier de las maneras, el 14-D iría mucho más allá en el terreno de lo histórico. En una situación de creciente debilidad sindical, primero, por la aparición de la “cultura de la temporalidad” que había no sólo degenerado en un peligroso proceso de *dualización laboral*, con los consiguientes y numerosos recortes de los derechos laborales garantistas; sino que a su

⁶⁷⁶ Véanse aquí, los nueve comunicados emitidos por parte del Comité de Huelga de CCOO, y que permiten recorrer, desde una visión sindical, el desarrollo, paso a paso, del 14-D. Los mismos se pueden localizar en: ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y..., op.cit.*, pp. 231-236.

⁶⁷⁷ Por ejemplo, el titular de *El País* dejaría bien claro tal éxito sin ambigüedad de ningún tipo: Noticia, “La huelga general paralizó ayer España”, *El País*, 15 de diciembre de 1988. Por su parte, *ABC* optaría por un burdo montaje y una lectura en términos personales: Portada, “Redondo le gana el pulso a González en una huelga general dominada por el miedo”, *ABC*, 15 de diciembre de 1988. Al igual que ocurría con la inmensa mayoría de periódicos, *ABC* no saldría tampoco a la calle el 14 de diciembre.

⁶⁷⁸ Noticia, “Masivas manifestaciones en Barcelona, Sevilla y Valencia”, *El País*, 15 de diciembre de 1988.

⁶⁷⁹ Véase una posible descripción de la misma en, Noticia, “Una masiva manifestación cierra en Madrid la semana de movilizaciones”, *El País*, 17 de diciembre de 1988. Hasta el propio *ABC* destacaría el éxito de la misma: Portada, “Manifestación para rubricar la huelga general”, *ABC*, 17 de diciembre de 1988. Sobre el número de asistentes nos remitimos a la tabla “11. Asistentes a las manifestaciones 14-D”, procedente de, ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y..., op.cit.*, pp. 229-231.

⁶⁸⁰ Véase lo apuntado en la *nota* 475.

vez había conllevado a un acelerado debilitamiento de las bases tradicionales del movimiento sindical español⁶⁸¹. A su vez, la convocatoria del 14 de diciembre, también se constituiría –a su manera– en la última huelga a la *ofensiva* por recuperar un terreno político y laboral a la par que sindical. O dicho, con otras palabras, se transformaría en la “última gran oportunidad” de modificar el rumbo económico. No obstante, los resultados finales distarían en mucho de los objetivos de CCOO y UGT. Nuevamente, se repetiría una dinámica habitual dentro del movimiento sindical español. Si bien, la capacidad de movilización demostrada no era cuestionable, la capacidad de gestión nunca constituiría uno de sus puntos fuertes.

El mismo 14 de diciembre de 1988, UGT y CCOO harían público un comunicado en el que reclamarían el éxito de la convocatoria, sin olvidarse de la defensa de su razón de ser a través de los correspondientes instrumentos democráticos y legales. Hasta ese punto se había llegado en los días previos:

«El paro general del 14 de diciembre, realizado de manera cívica, ordena y pacífica, ha supuesto el respaldo más rotundo a las reclamaciones sindicales y a las demandas de que haya una orientación más socialista en la política del Gobierno.

La participación de millones de trabajadores, trabajadores y otros muchos colectivos sociales, con entusiasmo, en una movilización sin precedentes, ha constituido una reafirmación democrática, a la vez que una consolidación del sindicalismo».

Ambas centrales dejarían sentadas a partir de ese mismo momento sus cinco reclamaciones, a las que calificaban de “previas e irrenunciables”: a) retirada del PEJ y puesta en marcha de otro plan de empleo; b) recuperación del poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios; c) incrementar la cobertura del desempleo al 48%; d) equiparación de la pensión mínima al SMI; e) y reconocimiento de los funcionarios a la negociación colectiva plena. A lo que se sumaría su tajante negativa a que los empresarios de la CEOE estuvieran presentes en las posibles negociaciones que se pudieran llegar a abrir⁶⁸².

Y concluirían de la siguiente forma:

«En este momento somos depositarios de una confianza y una fuerza que estamos decididos a administrar y a llevar a cabo también conjuntamente las organizaciones sindicales, de manera que los objetivos perseguidos puedan convertirse en realidad muy pronto.

⁶⁸¹ «La contratación temporal, por tanto, tenía efectos negativos para los sindicatos por varios motivos: uno, porque su base de representación se vía reducida, y dos, porque dificultaba su capacidad para movilizar a los trabajadores y, por tanto, para hacer frente a empresarios y gobierno». CERVIÑO, Emma, *Políticas de representación...*, *op.cit.*, p. 235. Añadiendo más adelante: «De este modo, para que los sindicatos decidiesen emprender acciones contra la temporalidad, no bastaba únicamente con que fueran conscientes del peligro que este tipo de empleo representaba para su futura supervivencia organizativa. Los sindicatos necesitaban además, tener expectativas de que sus estrategias tendrían éxito y de que implicarían los menores costes organizativos posibles. Y ello fue posible una vez que ambas organizaciones decidieron actuar conjuntamente». *Ibíd.*, p. 245.

⁶⁸² Véase, en primer lugar, “Manifiesto de UGT”, *Unión*, nº 105, (1989), p. 5. Documento redactado el mismo día 15 diciembre de 1988, y en donde se recogía la anterior tabla reivindicativa. Noticia, Carmen Parra, “Los líderes sindicales no acudirán a una reunión con González si asiste también Cuevas”, *El País*, 16 de diciembre de 1988; Noticia, “Cinco condiciones «previas e irrenunciables»”, *El País*, 16 de diciembre. Aquel mismo viernes 16 de diciembre la Plataforma Juvenil por el Empleo sacaría un contundente comunicado contra el Gobierno, reivindicando el éxito de la huelga como un *éxito propio* como del conjunto de la clase obrera. Véase: AHFFLC, PLATAFORMA JUVENIL POR EL EMPLEO, “Comunicado del 16 de diciembre de 1988”, Madrid, sig. 002462-002.

Ello ha de contribuir, además y poderosamente, al fortalecimiento del sindicalismo que hoy, como siempre, es esencial para defender los derechos de los trabajadores y constituye un componente fundamental para la vertebración democrática de nuestra sociedad»⁶⁸³.

También sin tiempo que perder Redondo se dirigiría por carta al Presidente el mismo 15 de diciembre en los siguientes términos:

«Como consecuencia de la reunión entre la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, la Ejecutiva de UGT ha adoptado la decisión de exponerte los criterios y reivindicaciones sindicales en relación con la actual situación, y con este fin, te manifestamos lo siguiente:

El respaldo que millones de trabajadores, trabajadoras y otros muchos colectivos han prestado al paro general del 14 de diciembre pasado ha supuesto un rotundo respaldo a las reclamaciones sindicales de que se produzca un giro social en la política del Gobierno.

A la vez, el extraordinario eco de las movilizaciones ha significado tanto una reafirmación democrática como una revitalización de los valores de solidaridad y progreso que han de contribuir al reforzamiento del conjunto de la izquierda en nuestro país.

[...].

En segundo lugar reiteramos el planteamiento, que venimos realizando desde hace años, de que se realice un auténtico giro social, para lo que proponemos una negociación entre los sindicatos y el Gobierno, sobre un conjunto de medidas que conduzcan a un cambio de la política económica y social.

[...].

Esperamos una respuesta positiva y estamos, en cualquier caso, plenamente dispuestos a mantener, si lo estimas oportuno, una reunión conjunta de ambos sindicatos contigo con esa finalidad.

Afectuosamente.

Nicolás Redondo»⁶⁸⁴.

Lo que va a suceder en los días siguientes es el resultado de una suma de *debilidades* como de *nuevas legitimidades*. Igualmente ha de tenerse presente lo que acontecerá en los siguientes meses, en donde el Ejecutivo y el Partido serán capaces de remontar, poco a poco, aquella situación adversa, e inclusive recuperar la iniciativa política. He aquí el gran éxito político-estratégico del socialismo español post-14-D.

Así pues, nos encontraríamos con una primera etapa que se inicia un 26 de diciembre de 1988 con el primer encuentro en La Moncloa entre González por un lado, y Redondo y Gutiérrez por otro, y que se puede llevar hasta la primavera de 1989 con la aprobación de un conjunto de medidas legislativas de *tono social*; la segunda fase, partiendo de esta última circunstancia, finalizará en octubre de 1989 con el tercer triunfo consecutivo de los socialistas, quienes a pesar de su muy notable desgaste electoral, se mantendrán en el poder, a través de una mayoría absoluta técnica.

A lo largo de dichos meses, la dinámica político-sindical estaría marcada por un intento de retomar el diálogo social, en torno a una serie de propuestas centradas en mundo del trabajo, pero que tendrán un similar recorrido a lo que había previamente sucedido con las *non-natas* negociaciones de mayo de 1988 y de octubre/noviembre de 1988.

Dos fases, en donde a pesar del éxito del 14-D en momento alguno se llegaría a alcanzar un acuerdo social, de mínimos ni de máximos, y que finalizaría con nuevos enfrentamientos entre CCOO y UGT y el Gobierno. Todo ello en un claro ejemplo de que la concertación social, y con ello la *paz social*, eran cosas de un pasado reciente pero un pasado, a fin de cuentas, que

⁶⁸³ “Manifiesto de CCOO y UGT. Después del paro general del 14 de diciembre”. Texto que se puede consultar en, ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y...*, *op.cit.*, pp. 236-237.

⁶⁸⁴ “Carta de Nicolás Redondo –Secretario General de UGT– a Felipe González –Presidente del Gobierno–”, *Unión*, nº 105, (1989), pp. 6-7. También se incluía en aquel número la carta de contestación a la misiva enviada por el propio González, antes de que, a buen seguro, llegará la primera de Redondo, y en donde se negarían por activa o pasiva a que participarán los empresarios.

no volvería a tener ningún tipo de posible reproducción a lo largo de la época socialista. En ello mucho pesaría una *voluntad política* del Ejecutivo que por más que mostraría parcialmente flexible, no estaría por la labor de cuestionar la política económica seguida hasta entonces así como en el futuro más próximo.

El conjunto político de la familia socialista, presos de sus propios errores, de sus comportamientos públicos y políticos, pero ante todo fracasada toda su estrategia movilizadora –o mejor explicado, *desmovilizadora*– y publicista contra todo lo que llegaría a significar la convocatoria de la huelga general del 14-D, sabía que había llegado la hora de reflexionar sobre el camino emprendido. Incluso, el siempre fiel aliado, *El País*, anunciaba como la “huelga general política se ha llevado a cabo con notable éxito para los convocantes, y, por consiguiente, la pelota ha cambiado de tejado”. Una nueva situación que “obligaría a cualquier Gobierno fuerte –y el de Felipe González lo es, para envidia de sus opositores políticos– a modificar su actitud de fondo ante los sindicatos”. Resultaría, además, entonces que la siempre pregonada “debilidad estructural de los sindicatos y su relativa representatividad deberán en adelante ser matizadas”. No sólo se trataba, en suma, de modificar talantes y comportamientos, sino de abrirse de veras al diálogo. “Ahora falta el primer gesto”, concluiría el editorial publicado un 15 de diciembre⁶⁸⁵.

Felipe González estaría por *tirar la toalla*. No era la primera vez, pero sí la más firme en términos políticos. Todavía bajo el *shock traumático* –de ruptura del “equilibrio psicológico” hablaría Alfonso Guerra⁶⁸⁶– avanzada la noche el Presidente llamaría a “Narcís Serra para pedirle que fuera él quien asumiera la situación”. Horas antes, su esposa, “Carmen Romero [...] llamó a los amigos más próximos para pedirles que por Dios le dejaran marchar”. Pero sería, al final, el propio Narcís quien insistiría en su continuidad convenciéndole finalmente. “¡Felipe, resiste! Si te marchas ahora es cuando realmente has perdido; si aguantas, terminarás ganando”⁶⁸⁷.

Aguantó, resistió y fue capaz de recomponerse. En buena medida, lo anterior, sería posible por lo que en tantas ocasiones señalarían los propios sindicatos: su objetivo no era tumbar un gobierno, sino una política económica a la que se la calificaba como plenamente liberal. Y así fue. Ahora bien, lo que a Felipe González y su equipo económico le quedaba por delante, lecciones aprendidas incluidas, eran duros y tensos tiempos políticos. El primero, el 21 de diciembre en el Congreso de los Diputados. Dicho miércoles, una semana después del 14-D, por primera vez en muchos años, González admitiría errores y llamaría a *otro tipo de diálogo*, aunque todo ello dentro de un *tono* perfectamente comedido.

Por razones que se desconocen, en el Diario de Sesiones de aquel día no aparecen las palabras textuales del propio Presidente del Gobierno, sino un resumen de su intervención. En cualquier caso, el mismo es altamente significativo del contexto político que se vivía.

«Respecto al éxito político de la huelga, señala que hemos vivido un conflicto social de la máxima envergadura, del que no se conocían precedentes, justamente cuando con el esfuerzo de toda la sociedad nos encontramos en una situación económica más favorable y con una creación de empleo estimable, aunque insuficiente, y cuando en el Parlamento están a punto de aprobarse unos Presupuestos que aumentan para el año próximo de manera importante el gasto social».

⁶⁸⁵ Editorial, “La pelota, en el tejado”, *El País*, 15 de diciembre de 1988.

⁶⁸⁶ GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, *op.cit.*, p. 329.

⁶⁸⁷ GUINDAL, Mariano, *El declive de...*, *op.cit.*, p. 310. Un hecho del que se harían eco no pocos medios –a excepción de *El País* en este caso–. Así por ejemplo, *ABC* llevaría a su portada el viernes 16 de diciembre el siguiente titular: Portada, “Felipe González hundido”, *ABC*, 16 de diciembre de 1988. Remarcando lo siguiente: «Fuentes cercanas a la Moncloa informaron que el presidente del Gobierno se encuentra profundamente abatido y en un estado de creciente depresión tras el éxito de la huelga general». Para completar su labor informativa publicaría un editorial reclamando la necesidad de legislar el ‘derecho de huelga’: Editorial, “Huelga y democracia”, *ABC*, 16 de diciembre de 1988.

No sólo reconocería aquel *éxito* sino también el “duro golpe” político recibido. Así pues: “El Gobierno tiene que asumir que no ha sabido o podido evitar la huelga y que no ha podido o sabido garantizar el derecho al trabajo para los que han deseado ejercerlo”. Sin salir aún de su particular asombro por lo que califica como una *paradoja*, “al haber ido a las elecciones con un programa económico-social que cree se está cumpliendo razonablemente, estando interesados en llevar adelante un proyecto de modernización económica y de justicia para España en el mercado de las posibilidades reales”.

Paradojas y asombros aparte ante la actitud de falta de dialogo o al menos de voluntad de acuerdo de alguna confederación sindical convocante –y citaba explícitamente a la UGT– reconocía que no le quedaba más remedio que volver a la siempre *deseada* negociación:

«Para salir de los simples juicios de intenciones, una vez más proclama públicamente, no sólo el deseo del Gobierno de negociar, sino la convicción de que éste es el mejor camino en democracia y el que más se ajusta al proyecto de articulación de la sociedad».

Reconocida la derrota y realizada la correspondiente llamada al diálogo “sin condiciones previas”, de cualquier de las formas el mismo debería enmarcarse dentro de las “posibles respuestas en el marco de nuestra realidad económica”. Un primer aviso no menor. Tras enumerar las condiciones sobre las que sentarse a hablar, recordaba y reforzaba la *idea-fuerza* de la legitimidad política del Ejecutivo emanada de las urnas. Otro segundo aviso: “[E]l Gobierno está obligado a atenerse en sus decisiones a lo que resulta posible y sea compatible con un proyecto razonable de desarrollo económico y de justicia social”. He aquí el tercer y más importante aviso, se podía hablar de lo que se quisiera, pero modificar la *dirección* de la política económica no entraba en sus cálculos.

A la hora de discernir acerca de los motivos de la convocatoria, por primera vez, en mucho tiempo se admitirían errores y no eran pocos. Ello, por más, que se quisieran adscribir a cuestiones estéticas antes que éticas y menos políticas dentro de la ya asentada dialéctica socialista:

«En el tema de los contenidos expresa su acuerdo con los que dieron lugar a la movilización e incluso piensa que los contenidos de la protesta social pueden ser mucho más amplios, reconociendo así que hay otras causas de malestar, de algunas de las cuales es sin duda responsable el Gobierno, en algunos casos por un error de imagen».

Y en relación a las cinco grandes cuestiones sobre las que se asentaría la futura mesa de negociación social, la primera sería la retira del PEJ. Allí anunciaría como “el Gobierno hace el gesto de retirar ese plan de empleo”, eso sí, “pero exponiendo en la mesa de negociación sus ideas para procurar romper la barrera que impide la entrada en el mercado de trabajo de los jóvenes”. El segundo punto de debate se centraría en buscar formulas para recuperar, “al menos dos puntos de poder de compra perdidos en el año 1988”. Pérdida adquisitiva “por error en la previsión de inflación”. Verdadero campo de batalla política-sindical, también se aceptaba e inclusive se daba la cifra de cómo tal medida se cifraba en “134.000 millones para 1988, con un impacto adicional para 1989 de 141.570 millones”. En relación a la tercera cuestión, y que motivaría, en breve, el bloqueo de la mesas de negociación, citaba la propuesta sindical de alcanzar la “cobertura del 48 por ciento del desempleo”. Cifra que no se había podido alcanzar por las “limitaciones presupuestarias que no son superables”. Pero también aquí el “Gobierno está dispuesto a negociar un incremento de la cobertura”, aunque sin más datos de por medio. En cuarto lugar, se hablaba de la “equiparación en esta legislatura de la pensión mínima al salario mínimo”. Tras recordar como dicha medida estaba incluida en el programa electoral socialista de 1986⁶⁸⁸, se anunciaría su cumplimiento “en el plazo previsto, existiendo, por tanto, una identidad de objetivos con las peticiones sindicales”. Y, “[f]inalmente, existe una quinta reivindicación pidiendo que se reconozca el derecho pleno a la negociación colectiva de los

⁶⁸⁸ AHFPI, PSOE, “Programa 1986/1990 Para seguir avanzando. Por buen camino”, Madrid, PSOE, 1986, sig. Fa 2098, véase en concreto el apartado “IV. Una sociedad más justa: redistribución de la renta y calidad de vida” (pp. 59-ss).

funcionarios públicos”. Se recordaba allí se había alcanzado, en su día, un acuerdo con el CSIF pero no UGT y CCOO, aunque todo se andaría. Y concluía:

«Sobre el giro social de la política económica, el Gobierno también cree que es deseable que se produzca un proceso de redistribución de la riqueza, pero dejando bien claro que la riqueza de un país es la que es, a cuyo hecho real han de atenerse»⁶⁸⁹.

El titular de *El País* el jueves 22 de diciembre hablaba de cómo “González reconoce la necesidad de un cambio en la forma de gobernar”⁶⁹⁰. Más aún, pues, en el editorial de aquel mismo día titulado significativamente, “Reencuentro con el Parlamento” comenzaba de la siguiente forma: “Un Felipe González humilde y generoso –y por consiguiente, inédito– abrió ayer en el Congreso de los Diputados un debate político que devolvió a la Cámara el espíritu para el que fue recreada en los albores de la transición política”. Reconocido el *giro político* del Presidente, apenas se citarían los “errores políticos del pasado”, se incidiría como el propio González “pareció en ocasiones más bien un buen ministro de Economía que el líder político del Ejecutivo”⁶⁹¹.

Incluso desde la UGT se emitiría un medido *comunicado* al respecto. Calificado como de “positivo” el hecho de que González hubiera reconocido la legitimidad de las reivindicaciones, no obstante, se criticaría la siempre buscada ambigüedad; “Para la UGT, la intervención del Presidente del Gobierno no ha despejado la necesaria interlocución que debe abrir este proceso”. E invitaba a mostrar esa “nueva actitud” en la “reunión bilateral que mantenga en próximos días con los sindicatos”⁶⁹².

Cinco días más tarde, el lunes 26 de diciembre, González Márquez asumiría otra pequeña derrota política por más que está, en la práctica, quedara limitada al espacio de los *símbolos*, de los *gestos*. El mismo día en que Baltasar Garzón encargado de investigar los GAL, pedía “mesura y rigor” al propio Felipe González, por sus declaraciones con respecto a su absoluto desconocimiento sobre el asunto⁶⁹³; recibiría a Redondo y Gutiérrez en La Moncloa para retomar el diálogo. De entrada, parecería la prepotencia y altanería anteriores iban a dar paso a otro tipo de actitud. No fue así. Las formas exhibidas, de hecho, no dejaban de ser parte de una cuidada puesta en escena. Así los recelos, las distancias pero ante todo las desconfianzas seguirían presentes en aquella como en próximas reuniones. Con o sin 14-D existían unas dinámicas difíciles de romperse. Y así fue. Junto con lo que se contó o se quiso contar a los medios de comunicación la reunión se constituiría en un sonado *fracaso*⁶⁹⁴.

⁶⁸⁹ CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE, *Comparecencia del Gobierno para informar sobre el desarrollo de la jornada del día 14 de diciembre de 1988*, III Legislatura, nº 162, 21 de diciembre de 1988 (número de expediente 210/00020), pp. 9261-9623.

⁶⁹⁰ Noticia, “González reconoce la necesidad de un cambio en la forma de gobernar”, *El País*, 22 de diciembre de 1988. Asimismo no deje de verse el número doble de *El Socialista* tras el 14-D, que se encabezaba de la siguiente forma: Portada, “Voluntad negociadora”, *El Socialista*, nº 467-468, (1988).

⁶⁹¹ Editorial, “Reencuentro con el Parlamento”, *El País*, 22 de diciembre de 1988.

⁶⁹² “UGT ante el debate parlamentario”, *Unión*, nº 105, (1989), p. 14.

⁶⁹³ Noticia, “El juez de los Gal pide a González «rigor» en sus declaraciones”, *El País*, 27 de diciembre de 1988.

⁶⁹⁴ «En la reunión, con el presidente del Gobierno al frente de la delegación, no fue posible ningún acuerdo. Fue una prueba muy difícil para Felipe González. Antes de acudir a la reunión le había preguntado al ministro de Economía cuál era el margen económico para la negociación y hasta dónde podía ofrecer a los sindicatos. El ministro le suministró la cifra máxima: 180.000 millones de pesetas. Cuando en la reunión con los sindicatos el presidente ofreció la cifra máxima, Nicolás Redondo le humilló, mofándose de él, dado que en relaciones de segundo nivel del sindicato con el Ministerio de Economía se le habían ofrecido 350.000 millones. Es fácil imaginar el enfado del presidente del Gobierno [...]. La reunión terminó en fracaso, lo que le llevó a Felipe a declarar: ‘La concertación social, como se concibió en la transición, está acabada’». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., p. 331.

Durante las cuatro horas que duraría la mencionada reunión, de las cinco demandas sindicales tan sólo se aceptarían discutir cuatro y bajo criterios totalmente diferentes entre los participantes. Parecía, entonces, lejísimos aquella apertura de miras del propio González en sede parlamentaria. Entre las escasas demandas aceptadas estaría la retirada definitiva del PEJ, aunque no se alcanzaría acuerdo ninguno en que la futura mesa de negociación de empleo no hubiera presencia de empresarios. Más allá de los puntos de acercamiento en torno a la negociación colectiva de los funcionarios y la equiparación de las pensiones al SMI, en donde no habría punto de encuentro alguno sería en el incremento de la cobertura del desempleo. La sensación de los agentes sociales a la salida de la Moncloa era que la situación era “similar a la que existía en los encuentros que mantuvieron en la primavera pasada”. Una señal de cómo la inicial *voluntad política* del Ejecutivo era limitada y parecía, además, haber perdido enteros en menos de una semana⁶⁹⁵.

Por otro lado, y una vez guardado en algún cajón ministerial el PEJ, fortalecida internamente la UGT, afianza la “unidad de acción” con Comisiones Obreras, ahora sí, y sin vuelta atrás, la *ruptura de la familia* socialista llegaría a su culmen. En paralelo, a las negociaciones para atender las demandas sindicales que se concretarían para finales de marzo a un veloz ritmo; a principios de enero de 1989, la guerra entre UGT y el PSOE –y en menor medida también frente al Ejecutivo– se recrudecería.

«En primer lugar, queremos dejar constancia de nuestra preocupación por la política que últimamente está desarrollando el PSOE y que, a nuestro juicio, es contraria al movimiento sindical y particularmente a la política sindical que viene defendiendo la UGT. Consideramos que esta actitud, aunque no es nuestra incumbencia manifestarlo, está en clara contradicción con nuestros estatutos, con la tradición y la historia del Partido Socialista Obrero Español».

Así se despachaba el primer punto una carta firmada por Antón Saracíbar en nombre de la CEC de UGT, dirigida al Presidente y al Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, pero que también tenía otro destinatario: José María Benegas, convertido en el verdadero *azote* de la campaña socialista antisindical. Se recordaría allí de igual forma “la intolerable injerencia que, con motivo del 14-D, han llevado cabo, en organismos de UGT, responsables al más alto nivel del PSOE y del Gobierno”. Movimientos con “el objetivo de desestabilizar a nuestra organización”. Conspiraciones que habían tenido su continuación tras el 14-D, y que se habían concretado en las “declaraciones que se han hecho sobre la eventual sustitución de la actual dirección de UGT por otra, presuntamente más afín al PSOE”. Con la defensa cerrada de la autonomía sindical por delante, se reclamaría, por último, el “reconocimiento del protagonismo de los sindicatos en la defensa de los intereses de los trabajadores”. Con un frío, “[s]in más por el momento, recibir un fraternal saludo”, concluía aquella misiva, fechada un 10 de enero de 1989⁶⁹⁶.

Aunque más cautos, la dirigencia socialista –tras un no sencillo proceso de digestión de su incuestionable *derrota política*– optaría por no moverse de las posiciones y defender, realizadas las necesarias reacomodaciones, la política económica y social del Ejecutivo. Lo que Vega ha denominado “maniobras dilatorias que vayan enfriando el efecto del 14-D”⁶⁹⁷. La primera de las mismas tendría lugar los días 13 y 14 de enero en la primera reunión del CF del PSOE post-14-D. Allí los socialistas se proclamarían orgullos de su gestión, y en donde la huelga general sería tratada como un asunto menor. Al parecer el 14-D tan sólo había sido una *pequeña piedra* en el único camino. Tan sólo eso.

En el *informe* presentado se volvería a insistir en los argumentos ya expuestos: “El primer efecto –y riesgo– de la dinámica que puede haberse abierto, se refiere a la misma

⁶⁹⁵ Noticia, “El Gobierno y los sindicatos reabren la mesa para la concertación social”, *El País*, 27 de diciembre de 1988.

⁶⁹⁶ AHFFLC, UGT-CEC, “Carta de José A. Saracíbar –Secretario de Organización de UGT– a José María Benegas –Secretario de Organización del PSOE–”, Madrid, 10 de enero de 1989, sig. 002906-005.

⁶⁹⁷ VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, op.cit., p. 247.

funcionalidad normal y legítima de las instituciones propias de una democracia”. Tras recalcar los logros económicos y *vestir* a su política económica como de social, allí saldrían a *relucir* las que serían las nuevas tesis socialistas, en adelante, de cara a la interpretación de la estructura social y la correspondiente adecuación programática: *fin de obrerismo*⁶⁹⁸ –en un claro gesto de *soberbia política*– y que materializaría después en el XXXII Congreso socialista en noviembre de 1990, acompañándose del *necesario ropaje teórico*⁶⁹⁹. El poder normativo de la *dialéctica socialista* se volvía a mostrar en todo su esplendor.

No pocos otros mensajes saldrían de la reunión del CF del PSOE. Por ejemplo que UGT se quitará las tenazas del comunismo español que le maniataban, según González⁷⁰⁰. Guerra, por su parte, utilizaría sus dotes de psicólogo proclamando como el problema de Redondo es que había querido ser Secretario General del PSOE desde Suresnes⁷⁰¹. Y pese a lo anterior no se dejaría en insistir a las llamadas a la recomposición de la familia socialista.

Pocos propensos a las críticas y menos a las autocríticas, se verían obligados a explicar a la militancia el estado de la cuestión existente en febrero de 1989, en relación a un diálogo social que parecía haber encallado sin posible *salida* a la vista. Y lo harían, una vez más, a través de una larga *circular* que contribuiría a ahondar en el *doloroso* divorcio de la familia socialista.

Con una capacidad sin igual a través de sus 19 folios en no nombrar lo *innombrable*, como si no hubiera tenido lugar la celebración de la huelga general el 14 de diciembre –otro de esos pequeños-grandes milagros de la *dialéctica socialista*– resultaba que “quizás más que nunca necesario que el partido muestre cohesión y coherencia en beneficio del proyecto socialista”, pero también, “en beneficio del conjunto de la sociedad”.

Sin moverse de las tesis antes defendidas, se volvía a mantener, con tanto o más ahínco, el talante dialogante del Ejecutivo. En base a la intervención de González el día 21 de diciembre en el Congreso de los Diputados y unos días más tarde tras su reunión con Redondo y González,

⁶⁹⁸ Véase los extractos del mismo en, “Construir un país modernos, más justo y solidario en el marco europeo”, *El Socialista*, n° 469, (1989), pp. 4-5 que recogía, a su vez, el informe presentado por José María Benegas en nombre de la CEF. Consúltese también: Noticia, Anabel Díez, “Felipe González advierte al partido sobre la posibilidad de una ruptura definitiva con UGT”, *El País*, 14 de enero de 1989; Noticia, Salvador Arancibia, “El gobierno, dispuesto a subir su oferta a 200.000 millones para conseguir la concertación social”, *El País*, 14 de enero de 1989. Días después el propio Redondo se mostraría profundamente pesimista en torno a la posibilidad de alcanzar cualquier tipo de acuerdo, mientras que los dirigentes socialistas creyeran que «los obreros han desaparecido». Noticia, Carmen Parra, “Nicolás Redondo ve difícil un giro social mientras que el Gobierno crea que «los obreros han desaparecido»”, *El País*, 22 de enero de 1989. Tiempo más tarde Astudillo afirmaría: «Pero, una vez que se produjo la ruptura del modelo histórico de relaciones con la UGT, en vez de pretender realizar directamente el papel que tenía asignado el sindicato en el intercambio político-electoral (como parecieron sugerir, sin embargo, en la resolución aprobada por el Comité Federal reunido tras la huelga general de 1988), decidieron dar por terminado los últimos vestigios de ‘obrerismo’». ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, op.cit., pp. 610-612.

⁶⁹⁹ Véase lo apuntado en la *nota 766*.

⁷⁰⁰ Noticia, “Felipe González pide a UGT que se aparte del proyecto comunista”, *El País*, 15 de enero de 1989.

⁷⁰¹ Noticia, Anabel Díez, “Guerra afirma que Nicolás Redondo quiere ser secretario general del PSOE «desde Suresnes»”, *El País*, 15 de enero de 1989. No faltarían, de hecho, las explicaciones –cuando no argumentos de muy variado *pelaje*– de este tipo, por parte de destacados dirigentes para explicar la ruptura de la familia socialista en años posteriores: «Creo que Nicolás [Redondo], como ya se he señalado, siempre había tenido la pretensión de ‘mandar’ en el Gobierno. Nicolás tenía una idea preconcebida, a partir sobre todo de 1985, cuando se aprueba la Ley de Pensiones: su idea era que aquel Gobierno no era un gobierno socialista. Y tenía la concepción de que el Gobierno hacía una política neoliberal. Era la época de las grandes frases, de las grandes ideas, de la deuda social, de la flexibilización». Manuel Chaves en declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 325.

se presentaría la retirada del PEJ como un gesto, “afín de iniciar el diálogo [...] sin condición previa”.

Poca o ninguna concesión habría a partir de ese punto. Tras volver a remarcar los cinco puntos de una posible negociación, se denunciaría la negativa de los sindicatos a sentarse en una misma mesa con los empresarios –“marco de negociación parcial” se denominaría– como primer punto de crítica. A partir vendrían las “limitaciones generales” a la que se enfrentaba el Ejecutivo, previa defensa de los “resultados de la política económica” y remarcando con la habitual vehemencia la imperiosa necesidad de “mantener la lucha contra la inflación”. Todo parecía indicar como la historia se volvía a repetir: el fracaso de todas y cada una de las negociaciones nunca se debía al Ejecutivo, sino a la parte sindical. Tampoco en aquella ocasión se iba a producir un *giro argumental*.

El citado documento continuaría con un repaso a todas las reuniones mantenidas. Por esta misma razón, el mismo puede constituirse en una buena *guía* de cara a seguir tales negociaciones, y examinar, a vez, como se gestionó desde el Ejecutivo como desde el Partido tal proceso.

Nos cuenta, en primer lugar, que en la reunión del miércoles 11 de enero de 1989, de entrada, se acordarían tres “aspectos importantes”. A saber, que los *cuatro puntos* finalmente acordados se tratarían en una única mesa entre “Sindicatos y Gobierno”; segundo, que no se sobrepasaría el mes de enero con el objetivo de terminar las mismas; y que en caso que de que no hubiera acuerdo “alguno” en los cuatro puntos, “tales quedarían consolidados”. En relación a las cuestiones con mayor interconexión con el mercado de trabajo –desde la equiparación de la pensión mínima al SMI a otras cuestiones de enorme calado– en las cifras y plazos propuestos por UGT y CCOO no habría acuerdo alguno. Como no habría acuerdo en la recuperación del poder adquisitivo como en el posible el aumento de la cobertura del desempleo.

Aquella circular no dejaba de ser una traslación sistémica de las posiciones gubernamentales, sin que apareciera posición alguna por parte del PSOE. Así tras reafirmar su oposición al *método* propuesto por los sindicatos y constatar las diferencias en los “criterios básicos”, se afirmaba: “Hasta tal punto que la cuestión no es tanto cuánto dinero ha de gastarse, sino el cómo ha de emplearse para que resulte más eficaz en orden al fin perseguido”. Con razón al día siguiente se hablaría en la prensa de un “rotundo fracaso del diálogo”⁷⁰².

El lunes 16 tendría lugar la segunda reunión. Allí ya se presentaría sendos documentos por cada parte. Un encuentro en donde se dejaría constancia de cómo el “coste total de la oferta del Gobierno en esta reunión negociadora, ascendencia a 206.000 millones de pesetas (145.000 millones en 1989 y 61.000 en 1990)”. Una elevación sobre el presupuesto inicial que los sindicatos volvieron a rechazar. En concreto, se decía como “mantuvieron invariable su postura”. Otro nuevo fracaso tras más de ocho horas de negociaciones en la sede del Ministerio de Trabajo, que no aventuraba ningún resultado positivo, mientras que los márgenes de negociación se iban limitando⁷⁰³. El martes 24 de enero, una semana después, se celebraría la

⁷⁰² Noticia, “El rotundo fracaso del diálogo entre Gobierno y sindicatos abre un período de tensión política”, *El País*, 12 de enero de 1988. Una línea de información –a la par, evidentemente, que de opinión– que quedaría todavía más clara al día siguiente: Noticia, Joaquín Prieto, “El Gobierno intenta ganar a la opinión pública para mantener su política económica”, *El País*, 13 de enero de 1989. Aquel mismo día también se publicaría el siguiente, Editorial, “Luz y taquígrafos”, *El País*, 13 de enero de 1989. En donde se decía: «Un gigantesco equívoco se cierne sobre la vida política española desde el pasado 14 de diciembre. Los sindicatos han interpretado el éxito de la convocatoria de huelga general en el sentido de que el contencioso que mantenían con el Gobierno había sido implícitamente zanjado por los votos de ocho millones de españoles. Sus reivindicaciones eran, por tanto, terreno conquistado. A su vez, el Gobierno, desconcertado por la amplitud de la movilización, ha analizado ésta como un desafío a su autoridad, legitimada en las urnas, para seguir gobernando. Así, las actitudes de ambas partes se encuentran trufadas de desconfianza y de personalismo estériles».

⁷⁰³ Noticia, “El Gobierno condiciona su nueva oferta al recorte de las peticiones sindicales”, *El País*, 17 de enero de 1988.

tercera reunión. En el mismo día en que Alfonso Guerra pediría a los militantes y dirigentes socialistas exhibir y el sentir orgullo por la gestión política realizada, las cosas no variarían en la mesa de diálogo⁷⁰⁴. Cuando los plazos dados se aproximaban a su fin, el Gobierno ofrecería la cifra total y prácticamente definitiva de 274.000 millones, que repartida en diferentes partidas se situaba todavía muy lejos de los 420.000 que pedían CCOO y UGT. Tampoco habría acuerdo. Al día siguiente, el miércoles 25 de enero, el Gobierno volvería a elevar su oferta en 344.000 millones de pesetas repartidos en dos ejercicios económicos. Cifra que “estaba situada en el límite de lo que permite hoy la economía”, se llegaría a reconocer en la citada *circular*, en lo que también era un reconocimiento –a la par que un implícito reconocimiento– de las bajas cifras ofrecidas en las primeras tres reuniones. Y como se aclaraba unas líneas más adelante:

«Sin embargo, esta oferta no mereció la consideración de los sindicatos que, condicionaron cualquier avance en la negociación del resto de los puntos, al cumplimiento de su exigencia de llegar al 48% en la tasa de cobertura de desempleo. Esto significa un retroceso a las posiciones de partida, ya que en la reunión del día 11 habían aceptado la posibilidad de consolidar acuerdos en algunos de los puntos».

La *ruptura* ya era un hecho como se anunciaría en todos los medios de comunicación⁷⁰⁵. Los socialistas sabedores de los *costes* de un nuevo *no pacto social* en aquellas circunstancias, y cuando apenas habían pasado mes y medio de la huelga general del 14 de diciembre, realizarían un último intento, aunque sin renunciar a su posición con respecto a la tasa de cobertura por desempleo y otras demandas sindicales. Cuando todavía la mesa de empleo ni siquiera se había puesto en marcha, convencidos de que un incremento final de las partidas presupuestarias podría poner punto y final a tal negociación, ofrecerían un 7 de febrero la cifra final –ahora sí– de 369.000 millones de pesetas. Erró el Ejecutivo una vez más. Los sindicatos denunciarían la “falta de voluntad política del Ejecutivo” en lograr un acuerdo sobre los aspectos que habían motivado en gran medida la convocatoria del 14-D⁷⁰⁶.

Con todo, a ese mismo resultado, en breve, se le trataría de darle la vuelta, al presentar a los sindicatos como una *banda de irresponsables* pero también como unos negociadores que tan sólo se habían basado en “maximalismos imposibles de satisfacer” y que, en definitiva, habrían imposibilitado cualquier posible acuerdo⁷⁰⁷. Una *idea-fuerza* que, como otras tantas, calaría en la opinión pública.

Rota quedaba la negociación. Nada nuevo, por tanto, que no se hubiera visto previamente. No obstante para el PSOE como para el Ejecutivo, las razones de aquella ruptura eran bien diferentes. Y como también era costumbre, resultaba que no se trataba de una cuestión política, sino estética:

«Nos encontramos pues ante una batalla por ‘ganar’ la opinión pública. Las batallas de imágenes son las peores enemigas para lograr un acuerdo.

En todo el proceso, creemos honestamente, hay un denominador común, la escasa voluntad de los Sindicatos por alcanzar un acuerdo, ya sea global, ya sea parcial».

Eso sí también se avisaba de lo siguiente: la paciencia gubernamental había tocado techo.

«La actitud de búsqueda de un acuerdo, tiene límites; límites que no se pueden sobrepasar, sin poner en peligro nuestro compromiso como partido mayoritario y como

⁷⁰⁴ Noticia, “Alfonso Guerra exhorta a los socialistas a que estén orgullosos de su gestión”, *El País*, 25 de enero de 1988.

⁷⁰⁵ Noticia, “Virtual, ruptura de la concertación entre los sindicatos y el Gobierno”, *El País*, 26 de enero de 1989.

⁷⁰⁶ Noticia, Carmen Parra, “Ruptura definitiva de las negociaciones entre Gobierno y sindicatos para la concertación”, *El País*, 8 de febrero de 1989.

⁷⁰⁷ PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González...*, op.cit., p. 344.

Gobierno, con una política económica y social, compromiso con nuestro propio programa, con nuestros electorales»⁷⁰⁸.

No habría un posible *final feliz*. De cualquier forma, dicha *ruptura* pronto sería leída en otros términos a más largo plazo. Así, por ejemplo, el mismo 8 de febrero en un contundente editorial de *El País*, se hablaba del “fin” del “modelo de concertación que ha formado parte de la cultura política con la que los socialistas lograron el poder en 1982”. La desconfianza y los recelos antes anunciados estarían muy presentes en el citado *no final feliz* como se recordaba desde el propio diario: “Las centrales han sospechado, no sin algunos fundamentos (véase la iniciativa del PSOE de crear delegados del partido en las fábricas), que los tecnócratas del Gobierno han pretendido aprovechar la confusión para segar la hierba a los sindicatos”. Una clara alusión a las interferencias por parte del equipo económico para entorpecer un posible acuerdo. Pero otro tanto había sucedido por parte de los “burócratas sindicales”. Así, y tras calificar como de “paranoico” el marco en que se había negociado, y denunciar las conspiraciones entrecruzadas, ambas partes habían salido mermadas de aquella negociación y se hablaba de cómo las mismas podían caminar, en adelante, “hacia el declive político”⁷⁰⁹.

Mucho más contundente se mostraría UGT tanto a nivel interno como externo. A través de su principal órgano de prensa, *Unión* –editado por la CEC de UGT y en concreto por la Secretaria Confederal de Prensa e Información– se publicaría un durísimo editorial que comenzaría de la siguiente forma:

«Desde la decepción que nos ha producido la determinación del Gobierno de hacer fracasar el diálogo social [...] se ha desperdiciado una excelente ocasión para haber emprendido una política económica y social que basándose, en el entendimiento mutuo y la solidaridad, fuese capaz de corregir las graves injusticias de nuestra sociedad, que se han visto acrecentadas con el ajuste de la crisis».

Se remarcaría, asimismo, tanto la falta de voluntad del Gobierno pero sobre todo las *actitudes* exhibidas durante la negociación, y que habían prontamente enterrado la inicial disposición de avanzar desde el Ejecutivo a un *giro social*⁷¹⁰. Para concluir con un mensaje destinado a la militancia, pero que ante todo buscaba el *reforzamiento interno* de la organización frente al cercano y problemático futuro que se avecinaba, y que, a su vez, conduciría a una potente campaña de afiliación:

«Pero es claro también que no podemos engañarnos acerca del momento tan difícil por el que está atravesando la vida pública de nuestro país. Por eso se hace hoy especialmente necesario fortalecer lo más posible nuestra organización y afianzar aún más sus raíces en el mundo del trabajo, única garantía de que vamos a mantener nuestra total autonomía y a seguir desarrollando una acción sindical intensa y efectiva, tal y como exige la situación actual. Y hemos de reforzar nuestra propia conciencia, la conciencia de todos los trabajadores de este país, presentándonos estrechamente unidos frente a la intransigencia de unos y a la insaciable voracidad de otros –unos y otros, hoy día aliados–, de modo que tenga que ser tenida muy en

⁷⁰⁸ AHFFLC, PSOE-CEF, “Circular nº 7”, Madrid, 23 de febrero de 1989, sig. 002906-005. Días después José María Zufiaur, el gran cerebro de UGT, escribiría un artículo titulado: “La concertación del Presidente González”. Para comenzar se señalaba como la misma se había caracterizado «por sus incumplimientos y por la coincidencia entre las posiciones del Gobierno y la de los sectores más conservadores». Tras hacer un sosegado repaso de cómo se había actuado unilateralmente desde el Gobierno en materia de política de empleo desde la misma firma del AES, concluiría: «Para la Unión General de Trabajadores, lo que verdaderamente arruina la concertación y el diálogo social es que el Gobierno no hace honor a lo que firma ni cumple lo que promete, así como el establecimiento de topes salariales por ley [...] y la defensa de los planeamientos regresivos de la derecha económica». AHFFLC, Fondo Zufiaur, José María Zufiaur, “La concertación del presidente González”, Madrid, 15 de febrero de 1989, sig. 001633-003.

⁷⁰⁹ Editorial, “Más que un fracaso”, *El País*, 8 de febrero de 1988.

⁷¹⁰ Véase, el particular balance elaborado por la UGT sobre el citado proceso negociador en, “El necesario giro social. Reflexiones tras la ruptura”, *Unión*, nº 106, (1989), pp. 4-5.

cuenta nuestra sólida voluntad de lograr una política económica y social que se oriente a favor de los asalariados y colectivos más desprotegidos»⁷¹¹.

La interpretación mayoritaria –una vez más desde el consenso hegemónico liberal, en este caso sin más adjetivos o especificaciones varias– ha tendido atribuir la mayor de las responsabilidades, unidireccionalmente, a los sindicatos de aquel *fracaso*. El argumento básico empleado, una y otra vez, es que CCOO y UGT quisieron doblar al Gobierno e imponer sus posturas. Sin duda estamos ante un debate abierto, en el que, en todo caso, la preponderancia de esta lectura dominante ha primado en la mayor parte de los exámenes ofrecidos en base a dos argumentos: la elevada cantidad exigida por los sindicatos y por la radicalidad de sus posturas⁷¹². ¿Fue realmente así? ¿Tan elevadas resultaban estas cifras cuando se observa tal periodo de forma global? Cuando menos habría que afirmar, que más allá de las cifras, el programa presentado por CCOO y UGT era antes que nada una propuesta socialdemócrata de cara a la economía y al mercado laboral. Y en cuanto a las cifras, *qué decir*, no se trataba tan sólo de una posible cuantificación sino de las voluntades políticas en juego.

Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado un 1 de abril de 1989 del Real Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, *de Medidas Adicionales de Carácter Social*, concluiría, a grandes rasgos, la efímera etapa del “pago de la deuda social”⁷¹³. Pero dicho esto, y desde una perspectiva global que observa en todo su desarrollo la época socialista, aquellas medidas, por más que estuvieran alejadas de las peticiones máximas de los dos grandes sindicatos⁷¹⁴, se convertirían, en términos históricos, en el máximo esfuerzo presupuestario social por parte del Ejecutivo. Una constatación a la par que una realidad histórica de por donde transcurrieron estos

⁷¹¹ Editorial, “Tenemos claro los objetivos”, *Unión*, nº 106, (1989), p. 3. Véase también, Editorial, “Por una UGT más fuerte”, *Unión*, nº 109, (1988), p. 3.

⁷¹² Por ejemplo consúltense aquí las interpretaciones presentadas por, entre otros, GUINDAL, Mariano, *El secreto de los...*, *op.cit.*; CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, *op.cit.*; o, POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*. Una contra-visión en, PÉREZ PÉREZ, José Antonio, “Una sociedad en transformación (1982-1996)” en YSÀS, Pere (ed.), *La época socialista...*, *op.cit.*. Una última lectura *ambigua* al respecto se puede encontrar en uno de los últimos trabajos publicados en castellano. *Ambigua* relativamente, pues, la interpretación vuelve a situarse dentro de un marco reduccionista centrado en la representación de los sindicatos como la principal fuerza oposición política, a la par que se obvia otros tantos elementos de análisis. Nos referimos, en concreto, al trabajo de Ángeles González en un dossier monográfico titulado *Consenso y enfrentamiento en la Democracia Española*, y que recoge, en suma, las tesis predominantes al respecto: «Respaldados por el éxito de la huelga general del 14-D, los sindicatos se atribuyeron la condición de actores políticos y, como tales, dotados de legitimidad para exigir la satisfacción de las demandas sociales hasta entonces insatisfechas por los poderes públicos. Dicho de otro modo, su indudable capacidad de movilización les llevó a estimar que contaban con el apoyo y la fuerza suficientes para imponer sus planteamientos a los empresarios y, sobre todo, dictar al ejecutivo la política socioeconómica». GONZÁLEZ, Ángeles, “Confrontación y consenso: la concertación social y el juego de intereses en España (1977-2010)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, *Consenso y enfrentamiento...*, *op.cit.*, p. 118.

⁷¹³ Real Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, *de Medidas Adicionales de Carácter Social* [B.O.E. 1 de abril de 1989]; Resolución de 6 de abril de 1989, *del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del real Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, de medidas adicionales de carácter social* [B.O.E. 11 de abril de 1989]. Consúltense también: Resolución de 6 de junio de 1990, *de la Dirección General del Régimen Jurídico de la Seguridad Social, por la que se dictan normas sobre suscripción del Convenio especial por los trabajadores que hayan agotado las prestaciones de desempleo contributivo y pasen a percibir el subsidio asistencial* [B.O.E. 11 de junio de 1990]. Sobre sus costes y efectos junto con las conclusiones finales expuestas al final del Capítulo 7, véase lo anotado en la *nota 41*.

⁷¹⁴ Con las siguientes gruesas palabras se despacharía un editorial de *Unión* tras la publicación de aquel paquete de medidas sociales: «Porque está visto que no ha sido bastante con la advertencia del 14-D y el poder parece necesitar de este nuevo recordatorio que, por lo mismo, para ser eficaz, ha de ser contundente». Editorial, “Para seguir luchando”, *Unión*, nº 108, (1989), p. 3.

tiempos políticos. No mucho tiempo más tarde, vendría a sumarse tiempo más tarde la Ley 26/1990, de 20 de diciembre *por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas*⁷¹⁵, y un año después la Ley 2/1991, de 7 de enero, *sobre derechos de información de los representantes de los trabajadores*⁷¹⁶, junto con otras normativas menores⁷¹⁷. Hasta aquí llegó el espíritu de “lo social” en este tiempo histórico.

Dejando para más adelante, el coste total así como sus efectos a nivel macroeconómico y social que representaría dicho conjunto de medidas⁷¹⁸, el citado RD-L vendría precedido por el Debate sobre el Estado de Nación de 1989, que se celebraría del 14 al 16 de enero de 1989. Rotas las negociaciones, Felipe González aprovecharía el mismo para lanzar un duro ataque contra los sindicatos, pero especialmente contra la UGT a quien se le acusaría de haber hecho imposible cualquier acuerdo, a la par que daba por “agotado” el modelo de concertación social existente. Y aquello constituía otra novedad histórica de calado, más allá del espacio en donde se emitiría el correspondiente “certificado de defunción”.

Una vez más, no faltarían las amenazas en adelante. O se pactaba, o el previsible gasto presupuestario sería notablemente menor al anunciado en las últimas reuniones con los sindicatos.

«Pero la realidad es que cada vez que el Gobierno, buscando el acuerdo avanzaba en sus ofertas, éstas se consideraban automáticamente comprometidas, aunque no se llegase a firmar nada, con el resultado de que el Gobierno se comprometía siempre cada vez que avanzaba un metro para alcanzar el acuerdo, mientras que los interlocutores sociales no se comprometían nunca [...]. Sin embargo, cree que es justamente esto lo que está fallando, produciéndose un desequilibrio grave entre la exigencia de poder y la dejación de responsabilidad que esa exigencia conlleva.

Informo igualmente de las ofertas realizadas por el Gobierno en relación con cada uno de los puntos objeto de negociación, en las que el Gobierno ha llegado a ofrecer un gasto social adicional de 369.000 millones de pesetas, de los que 296.000 millones tienen que corresponder al presente ejercicio y sólo 73.000 millones a 1990, a lo que Comisiones Obreras contesta que dicha cifra no supone más que el 50 o 52 por ciento de las cantidades económicas reivindicadas en los tres puntos que tienen contenido económico [...].

⁷¹⁵ Ley 26/1990, de 20 de diciembre, *por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas* [B.O.E. 22 de diciembre de 1990].

⁷¹⁶ Ley 2/1991, de 7 de enero, *sobre derechos de información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación* [B.O.E. 8 de enero de 1991]. Aunque no es este el espacio concreto o adecuado, al menos, queden aquí expuesto los objetivos centrales de la citada normativa a través de su propia *Exposición de Motivos*. Una Ley que se llegaría a considerar en su día como otro pequeño ‘logro’ por parte del movimiento sindical: «En el marco del diálogo social desarrollado entre Gobierno y los Sindicatos se ha puesto de manifiesto, como un paso más en la política de mejora y crecimiento del empleo, la voluntad común de evitar el fraude y los abusos en la contratación laboral. Fruto de este diálogo fue el acuerdo a que se llegó con fecha de 31 de enero de 1990 [...]. La presente ley, en cumplimiento y desarrollo de los indicados Acuerdos, fija el contenido del derecho de información de los representantes de los trabajadores en la empresa en materia de contratación laboral, estableciendo para ello la obligación de empleo de entregar a éstos una copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, con las excepciones que la propia Ley establece, así como la de informarles respecto de otros aspectos de interés, permitiéndoles con ello tener un más completo conocimiento de la dinámica de la contratación laboral y del empleo en la empresa y de su adecuación a la legalidad vigente». Al respecto véase el crítico como realista análisis de, MORENO, Agustín, “Breve historia del Estatuto de los Trabajadores, de sus reformas y consecuencias: el déficit laboral en España” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*. Véase también lo apuntado en la *nota 322* y en el *Capítulo 8, nota 383*.

⁷¹⁷ Por ejemplo: Ley 3/1989, de 3 de marzo, *por la que se amplían a dieciséis semanas el permiso por maternidad y se establecen medidas para favorecer la igualdad de trato en la mujer en el trabajo* [B.O.E. 8 de marzo de 1989].

⁷¹⁸ Véase lo apuntado en la *nota 432*.

A partir de la situación descrita, si los sindicatos reflexionan y aceptan las propuestas del Gobierno, habrá que ajustar las prioridades presupuestarias, para lo que el gobierno formulará una propuesta de disminución de gastos en otras partidas, pero si los sindicatos no aceptan, anuncia que el Gobierno cumplirá con sus propuestas del 21 de diciembre, lo que llevará a que el esfuerzo de ajuste en el gasto sea, lógicamente, menor»⁷¹⁹.

Con el apoyo de la derecha de AP, quien evitaría entonces desgastar todavía más al Gobierno –en lo que el propio Redondo calificaría como un “acuerdo antinatura”⁷²⁰– sumado a la promesa de revitalizar el funcionamiento del Congreso, entre otras cuestiones, se anunciaría asimismo como se estaba trabajando en un “decreto-ley por el que se asignan 200.000 millones de pesetas a los gastos sociales”⁷²¹. Detalles escabrosos aparte, desde el Grupo Parlamentario Socialista junto con el PNV también se vetaría la posibilidad de que los líderes sindicales comparecieran en la Cámara Alta⁷²². Con fundadas evidencias desde el propio *El País* se daría por muerto un día después el “modelo de diálogo económico-social”. Preguntándose: “¿Significa ello que haya que dar por concluido el diálogo social? ¿Ha terminado con esta etapa un venturoso período de paz social?”⁷²³.

En este contexto, por tanto, se aprobaría el RD-L 3/1989. A partir de las propias resoluciones aprobadas en el último día del debate del Estado de la Nación, el 16 de enero como se indicaba en la aséptica *Exposición de Motivos*:

«La compensación a quienes perciben retribuciones o pensiones del Estado a través de los Presupuestos y que hayan perdido poder adquisitivo a causa de la desviación de la inflación prevista en 1988, en términos tales que el efecto de la compensación, para los pensionistas, quede consolidado para el ejercicio 1989 y siguientes.

La equiparación, durante la presente legislatura, de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional.

⁷¹⁹ CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE, *Debate sobre el Estado de la Nación. Intervención del Presidente del Gobierno. Felipe González Márquez*, III Legislatura, nº 166, 14 de febrero de 1989 (número de expediente 200/000008), pp. 9810-9811. Véase también: Noticia, “González culpa a UGT de hacer imposible un acuerdo”, *El País*, 15 de febrero de 1989. Aquel mismo día *El País* publicaba un duro editorial contra la forma de entender la *vida parlamentaria* por parte de los socialistas, empezando por el propio González: «El Gobierno, descargado de presiones políticas solventes en su exterior parlamentario, ha acabado por interiorizar su soledad, creyéndose la leyenda de que su política económica era la única posible, por lo menos, la única racional. No es cierto, como se atisbó ayer: hay alternativas, y desde luego, hay otras políticas menos coherentes, algunas a la derecha y otras más a la izquierda». Y más adelante se afirmaba: «La otra batalla se dilucidaba en el campo del proyecto socialista. Felipe González oficializó la ruptura con los sindicatos, y con ella la del modelo autónomo que le llevó al poder en 1982. Su argumentación sobre la concertación resulta discutible, pero demuestra que los sindicatos han tirado demasiado de la cuerda que ahora amenaza su propia garganta [...]. Es posible que la concertación clásica haya fenecido. Pero si, pese a ello, el Ejecutivo mantuviese la voluntad política de negociar y las centrales admitieran la evidencia de que el 14-D no es un cheque en blanco de la sociedad española girado a su favor, hay oportunidades para que la situación pueda recomponerse en torno al *giro social*». Editorial, “El factor humano”, *El País*, 15 de febrero de 1989 [*cursiva* en el texto original].

⁷²⁰ Nicolás Redondo en declaraciones a, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, *op.cit.*, p. 170.

⁷²¹ Noticia, Concha Martín del Pozo, “El «giro social» del Gobierno se llevará a cabo sin aumentar los impuestos”, *El País*, 17 de febrero de 1989.

⁷²² Noticia, Joaquín Prieto, “El Gobierno y el PNV se niegan a que los líderes sindicales comparezcan en el Congreso”, *El País*, 17 de febrero de 1989.

⁷²³ Editorial, “La paz social”, *El País*, 17 de febrero de 1989. Véase tiempo más tarde, AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, pp. 25-26, sobre el balance que realizarían los socialistas al respecto de su contenido.

La ampliación de la cobertura por desempleo a los colectivos desempleados de larga duración, con consideración especial para los mayores de cuarenta y cinco años y para los que tengan cargas familiares.

El establecimiento para 1989 de la cuantía de las pensiones asistenciales y del subsidio de garantía de ingresos mínimos en 20.000 pesetas/mes, así como el pago de una sola vez, para los beneficiarios de esas prestaciones de una cantidad equivalente a un punto de la masa de tales prestaciones en 1988.

Fijar en sesenta y seis años el límite edad que diera derecho a ser beneficiario de la pensión asistencial en razón de la edad».

Sin querer extendernos por estas cuestiones, al menos, ha de destacarse uno de los aspectos más relevantes que allí se contemplaban. Nos referimos a la ampliación de la propia cobertura de desempleo, que si bien no alcanzaría las demandas sindicales, sí suponía un paso cuantitativo y cualitativo teniendo presente la realidad derivada de la aprobación en su día de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, *de protección por desempleo, por la que se modifica el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre*⁷²⁴. De esta forma, y a través del “Título V, Ampliación de las prestaciones de desempleo”, y concretamente por el artículo 20, “Modificación de determinados artículos de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, *de Protección de Desempleo*”, se realizaba una nueva modificación de los artículos 13, 14 y 15. Por este mismo camino, nuevos colectivos podrían acceder a la misma –por ejemplo, los mayores de 52 años a la par que otros veían mejoradas sus condiciones, a saber, los mayores de 45 años–. Tanto la cuantía como la duración se incrementaban vía artículo 14. Junto al resto de medidas contempladas, y que se han ido exponiendo, otra novedad apreciable se podía encontrar en el artículo 11 dedicado a “Pensiones especiales derivadas de la guerra civil, 1936-1939”. Finalmente en el artículo 22, “Costes estimado”, se cifraba el mismo en 197.600 millones de pesetas.

De nuevo, y sin haber renunciando a su “única política económica”, el Gobierno –siendo siempre consciente de que las aspiraciones y demandas sindicales no se verían frenadas con aquel Real Decreto-Ley de primeros de abril⁷²⁵– cuando menos conseguiría iniciar la recuperación del *terreno perdido* en los meses anteriores. Ahora bien, todavía quedaba otro escollo no menor. La apertura de un diálogo en torno a los serios problemas que afectaban al mercado laboral. Los recientes antecedentes ya expuestos condicionarían de entrada cualquier propuesta gubernamental. Así sucedió.

El tres de abril de 1989 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social daba a conocer a los agentes sociales, el *Documento de Trabajo para el Diálogo social sobre el Empleo*. Tras las sendas experiencias de mayo de 1988 y también de octubre de 1988, la presentación del mismo se llevaría a cabo con no pocas cautelas.

Sustentado en cinco grandes puntos –I. Fomento del Empleo Juvenil, II. Fomento del empleo estable, III. Fomento de la economía social, IV. Formación profesional y V. Medidas contra el fraude– el mismo presentaría un amplio cuadro de la realidad sociolaboral con las características básicas tantas veces apuntadas. Por más que se describiera una situación compleja, en lo esencial no se estaba dispuesto desde Trabajo y desde el Gobierno, con el

⁷²⁴ Ley 31/1984, de 2 de agosto, *de protección por desempleo, por la que se modifica el título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre* [B.O.E. 4 de agosto de 1984]. Sobre su origen, desarrollo, costes... se hablará tanto en el apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”, como de forma concreta a lo largo del Epígrafe “IV. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”.

⁷²⁵ Los sindicatos, por su parte, lanzarían duras campañas contra el citado RD-L. Por ejemplo, desde la UGT se pondría en marcha la campaña: “Ponte en tu sitio”, en donde se denunciaría como el «paquete de medidas sociales que ha aprobado el gobierno, a pesar del esfuerzo publicitario que realiza, tiene mucho más de ‘ruido’ que de ‘nueces’ ya que dichas medidas no reparan la ausencia de contenido social en la actual política económica». Acompañándose la misma de números gráficos y datos económicos. “Ponte en tu sitio”, *Unión*, nº 108, (1989), p. 23.

beneplácito de Economía, en modificar los puntos de apoyo sobre los que había basculado la política de empleo desde 1984.

Por cierto, una vez más, los jóvenes –“la llegada a la edad laboral de las generaciones de jóvenes más numerosas de la historia”, se remarcaría en el citado texto– se transformarían en los inesperados protagonistas de una mesa de diálogo que no llegaría a ningún puerto, y que finiquitaría, en definitiva, el último intento de restablecer algunos notables desequilibrios del propio mercado de trabajo.

Mal casaba, no obstante, la “sobre-atención” a los jóvenes con el silencio cuando no la omisión que se llevaría a cabo desde Trabajo a las múltiples peticiones de reunión, que se solicitaría desde la Plataforma Juvenil por el Empleo. *Plataforma* que tras la manifestación del 1 de diciembre pero también tras el 14-D había mantenido una apretada *agenda* de movilizaciones. Hastiados de que no fueran recibidos por el máximo responsable de Trabajo, le escribirían una carta el día 30 de marzo en donde solicitan, por enésima vez, ser recibidos. Con no poca ironía indicarían lo siguiente:

«A lo largo de este tiempo, hemos seguido y seguimos con interés sus declaraciones públicas y su exposición de los proyectos gubernamentales en materia de empleo. Nos ha resultado especialmente llamativa su revelación de que cientos de miles de puestos de trabajo están sin cubrir por falta de personal cualificado para desempeñarlos. En una orilla, los puestos de trabajo, esperando; en otra los jóvenes; en medio, las profundas aguas de la falta de capacitación profesional. Tal es el panorama que Vd. Presenta, y que a nosotros nos planteaba varios interrogantes».

Fecha un 30 de marzo de 1989, y tras toda una serie de interrogantes planteados, se indicaba como “[c]onfiemos en que la desaceleración del ritmo de reuniones con la pintoresca mini-plataforma partidaria del PEJ, hará posible que encuentre VD. el tiempo necesario para acceder a nuestra petición”. Para concluir: “No nos lo agradezca. Simplemente, entrevístese con nosotros. No le pedimos otra cosa”. Un ejemplo –a sumar a otras tantas decenas de posibles– que mostraba los tortuosos senderos de la falta de voluntad gubernamental de cara a entablar un abierto como sincero diálogo social⁷²⁶.

Volviendo al documento previamente citado, el balance presentado, en buena medida, no variaría de los anteriores marcos de análisis expuestos. La realidad laboral, era la que era, como tampoco cabría de prever –y más observando cómo había transcurrido el proceso negociador desde el 15 de diciembre de 1988– posibles modificaciones tanto en el diagnóstico como en el pronóstico sobre el estado de salud del mercado de trabajo, y específicamente, en lo que concernía al problema del desempleo juvenil.

Sin embargo, el documento de Trabajo destacaría en dicha precisa ocasión por una serie de pequeños detalles. En lo que no dejaba de ser un claro gesto a los sindicatos, se denunciaría abiertamente, en primer lugar, los pavorosos fraudes empresariales en relación a la vulneración sistemática de la legislación laboral. Así se llegaría a calificar a los mismos como “conductas desaprensivas”. Incluso yendo a lo concreto –en un tono más comedido– se hablaría no de *medidas* sino de una “serie de sugerencias para el debate en la mesa del empleo”. Y no había que ser un consumado experto para comprender la diferencia entre *medidas* y *sugerencias*. Un pequeño-gran detalle que marcaba la diferencia entre el antes y el después del 14-D. Precisamente, limitado al terreno de los *pequeños detalles*, junto con una serie de *rectificaciones parciales* quería circunscribir, a la hora de la verdad, la propuesta del Ministerio de Trabajo.

Continuemos. Tras apostar, entonces, por la formación profesional sin ambigüedades – lo que también significaba tampoco una *parcial rectificación* frente a las propuestas relacionadas con el PEJ– lo que no se observaba, por ningún lado, eran potenciales cambios sustanciales en las líneas maestras de la política de empleo hasta entonces seguida. De esta forma, se apostaba por continuar con la “experiencia adquirida durante el periodo de vigencia

⁷²⁶ AHFFLC, “Carta de la Plataforma Juvenil por el Empleo a Sr. D. Manuel Chaves –Ministro de Trabajo–” Madrid, 30 de marzo de 1989, sig. 001803-003.

del RD 799/85⁷²⁷, aunque tratando generar las condiciones necesarias de cara a garantizar la “estabilidad en el empleo”.

Puestos a escrutar los citados pequeños detalles, dicha propuesta –o si se prefiere *sugerencia*– no significaba una variación de lo hasta entonces realizado específicamente en materia de política de empleo juvenil. Por no cuestionar no se cuestionaba los resultados negativos de tal política. Pese a lo mencionado, por ejemplo, se mantendría la “desgravación fiscal de 500.000 pesetas en el Impuesto de Sociedades a empresas que aumenten sus plantillas utilizando para ello la contratación indefinida”; también se mantenían otro tipo de subvenciones vinculado con la “conversión en contratos indefinidos de los contratos temporales”; sumado a otra larga serie de medidas fiscales y económicas relacionadas con los mismos objetivos. Y con las mismas también se resaltaría –en otro claro signo dirigido a los potenciales negociadores– la intención –suponemos también que a modo de *sugerencia*– de potenciar la negociación colectiva.

Resumiendo, detalles menores ya resaltados, se seguían defendiendo la misma política de empleo. Que no estaba por la labor de modificar la misma, lo evidenciaría la parcial como limitada pretensión de introducir pequeños aspectos legislativos, a través de los cuales se pretendía *atenuar* –que no a subsanar o atajar directamente– los principales y perniciosos problemas asociaciones a las altas tasas de temporalidad laboral⁷²⁸. Una temporalidad que ya aparecía explicativamente como la consecuencia inevitable de la única política de empleo socialista. Por cierto, tampoco se volvería a atender el problema de la precarización laboral.

La cadena de reacciones que se había escenificado previamente el año anterior, se volverían a esbozar por y a través de los mismos argumentos tantas veces expuestos. Pero tal y como había reclamado el propio Presidente del Gobierno a dicha mesa cada agente social llegaría con sus propias propuestas. Por parte de Comisiones Obreras se presentaría un documento titulado *Análisis del empleo y paro. Propuestas de CC.OO.*. Texto en donde se denunciaría la política liberal del Gobierno, a través de un repaso de todas las medidas económicas y laborales puestas en marcha desde su llegada al poder. Con la crítica por delante a la inmutable persistencia a la tesis de la “única política posible”, se indicaba como se había considerado, dentro de este marco global, al “mercado de trabajo de forma aislada y totalmente autónomo del resto de la economía, pretendiendo convencer de que basta tomar medidas concretas y específicas para ese mercado hasta conseguir el nivel de empleo deseado”. Y concluyendo como “[s]ubyacen en estos supuestos las concepciones más liberales de la escuela neoclásica de economía”.

Junto con los centenares de datos expuestos sobre la precarización laboral, también se constataba como “hasta la fecha, el Gobierno del PSOE no ha sido capaz de articular ningún Plan de Empleo que podamos considerar como tal”. Y se apostaba no sólo por la estabilidad en el empleo, sino por la “eliminación [de] formas de precarización innecesarias en la actualidad”, así como por una “modificación, reordenación y simplificación vigente [de la] Legislación en materia de contratos temporales”, entre otras no pocas propuestas que incluían lo que se denomina un “Plan Especial de fomento de Empleo para jóvenes”, radicalmente enfrentado a las propias propuestas gubernamentales⁷²⁹.

Al día siguiente, un martes 4 de abril de 1989, la CEOE y CEPYME daban a conocer sus propuestas. Y lo hacían a través larguísimo informe de cerca de cincuenta folios, en donde se mostraran seriamente preocupados por “la expansión de los subsidios y del seguro del

⁷²⁷ Real Decreto 799/1985, de 25 de mayo, *por el que se incentiva la contratación de jóvenes trabajadores y se extiende esta medida a determinados programas y contratos vigentes* [B.O.E. 1 de junio de 1985]. Véase aquí también la *nota* 429.

⁷²⁸ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Documento de trabajo para el diálogo social sobre el empleo*, Madrid, 3 de abril de 1989 [s/p]. Documento localizado dentro de un dossier en AHFFLC, “Circulares de la Secretaria de Acción Sindical”, sig. 001876-002.

⁷²⁹ AHFFLC, “Análisis del empleo y paro. Propuestas de CC.OO.”, Madrid, sig. 001876-002 [s/p].

desempleo, en lugar de apostar con decisión por la promoción de nuevos empleos”. No sólo, pues, reclamarían “una sana política de moderación salarial y la eliminación de trabas y medidas disuasorias de la iniciativa empresarial”. Para a partir de ahí presentar sus “Criterios básicos para una política de empleo eficaz”. ¿Qué se entendía por “política de empleo eficaz”? Para comenzar se hablaba de la “línea causal del empleo”, en lo que no dejaba de ser un paquete de propuestas para mejorar la inversión privada, más allá de que se mencionara como su “prioridad absoluta” residía en el “fomento del empleo”, siempre y cuando se tratara de acciones referidas a los jóvenes que no han conseguido puestos de trabajo.

En tales labores plantearía una nueva “reforma del mercado laboral”, mostrando, a su vez, su tradicional interés por la necesidad de definir una “nueva política en materia de protección”, pero, ante todo, remarcarían su apuesta por la “eliminación de políticas «pasivas» que perjudiquen la generación de puestos de trabajo”. Igualmente esbozarían un conjunto de “medidas extraordinarias para la incorporación de los jóvenes a la vida laboral”. Propuestas con la que se buscaban reforzar todavía más el control de la formación profesional por parte las empresas y mejorar sus condiciones económicas. Todo ello sumado a ingeniosas medidas de cara a perseguir el *extendido fraude* contra el sistema de prestaciones al desempleo, que aunque no indicaba –así como no se aportaban datos– se intuía que cometían de forma generalizada los propios asalariados. Por más que se remarcaba que había que “[i]ncorporar a nuestra «cultura laboral» el concepto europeo de EMPLEO ESTABLE”, se seguía defendiendo el mantenimiento de las “diversas modalidades de contratación establecidas en 1984”⁷³⁰.

Con tales puntos de partida tan divergentes tendrían lugar dos primeras reuniones de la mesa de empleo. Todo ello en un contexto político delicado y marcado por la ruptura de las negociaciones del Gobierno con ETA. El lunes 10 de abril tendría lugar el primer encuentro con cinco puntos en el orden del día: política económica, mercado de trabajo, formación, profesional, economía social y control en la contratación fraudulenta⁷³¹. Un primer *tanteo* al que previamente había tenido lugar el 8 de marzo, a modo de apertura oficiosa de tal mesa de empleo. La segunda reunión sucedería el 17 de abril. El mismo día en que se conocía como la Administración había gasto cinco billones de pesetas en materia de desempleo y ayudas en la contratación, tan sólo entre 1983 y 1985. La misma, de nuevo, terminaría sin ningún acuerdo pero con la impresión de que la posibilidad de nuevas reuniones se diluía en a corto plazo. El hecho de no fijarse ninguna nueva reunión era todo un signo de un cercano fin. Opuestos los sindicatos a la vieja estrategia de establecer *mesas paralelas* –oficiales o no oficiales– desde el Gobierno también se repetiría la tan vieja estrategia de dar información a cuentagotas sobre la contratación temporal en sus más diversos aspectos⁷³². Ello cuando no se ocultaban otros tantos datos.

Los parecidos razonables de por donde habían transcurrido similares negociaciones eran considerables, y no anunciaban, exactamente, ningún tipo de acuerdo. Sin nada que temer ni que perder por aquellas alturas una vez constatada la nueva dinámica Partido-Gobierno-Sindicato; el martes 18 de abril UGT daba a conocer un duro documento en torno a los contenidos expuestos, hasta el momento, en la citada mesa de empleo. “El Gobierno ha puesto de manifiesto, una vez más, en la mesa de empleo, su intención de no abordar el problema del paro de forma decidida”, se decía al principio. Las conclusiones con respecto al “análisis de la situación” existente, y más allá de cómo se trataba de instrumentalizar los datos oportunos, conducirían a dos afirmaciones de calado. Primero, “se insiste en la bondad de la temporalidad para aumentar el empleo,

⁷³⁰ AHFFLC, CEOE y CEPYME, “Bases para una política de impulso a la inversión, a la competitividad y al empleo”, Madrid, 4 de abril de 1989, sig. 001876-002. Véase también, Noticia, Carmen Parra, “La CEOE se opone al reparto del trabajo y a la revisión de la contratación temporal”, *El País*, 5 de abril de 1984.

⁷³¹ Noticia, Marta Zhein, “Los interlocutores discutirán cinco puntos el lunes en la mesa de empleo”, *El País*, 11 de abril de 1989.

⁷³² Noticia, Marta Zhein, “El Estado gastó cinco billones en desempleo y ayudas a la contratación entre 1983 y 1985”, *El País*, 18 de abril de 1988.

afirmando incluso que esta temporalidad es lo que ha permitido reducir el desempleo”. Y segundo:

«[s]e dice que es conveniente fomentar el empleo estable, pero se le quita importancia a la precarización al afirmar que los contratos de duración determinada son prorrogados o convertidos en empleos estables, utilizando para ello encuestas que ni se mencionan, sin acudir a las estadísticas oficiales».

Mucho más crítica se mostraría con respecto a las propias propuestas esbozadas por Trabajo, que como se avanzaba “no constituyen un plan de empleo”. Observaba en tal texto una “mezcolanza” de temas esbozados que conducían a “confusión y falta de concreción”. Con ser grave lo anteriormente advertido, el documento presentado en relación a los jóvenes, “se limita a aumentar la edad para que puedan tener acceso a los distintos sistemas de complementación de su formación”. Asimismo, se observaba la todavía influencia y peso del PEJ en tales *sugerencias*:

«Bajo pretexto de que el joven adquiera una experiencia profesional práctica y un contacto real con la empresa, se intenta introducir algo similar al contrato de inserción para jóvenes con lo que en el documento se denomina ‘prácticas no laborales en las empresas’».

En suma, la “Administración pretende inhibirse de sus propias responsabilidades haciendo depender de la negociación colectiva las consecuencias de las medidas”. Así como se recordaba como las propuestas contra el fraude obviaba como el “principal problema se produce en la utilización inadecuada indiscriminada y abusiva de los contratos”⁷³³.

Previendo el cercano final a aquel *corto nuevo ciclo negociador*, la UGT reforzaría su posición con la celebración del VI Comité Confederal ordinario que se celebraría los días 24 y 25 de abril⁷³⁴. Una reunión que comenzaría de una intervención del propio Redondo. Intervención de contenido “radical” teniendo presente el pasado cercano, y en donde, entre otras cuestiones, criticaría lo siguiente: “Hay una situación caracterizada por motivaciones obsesivas y por la sacralización de las cifras. Pues bien, en alguna reunión de zona lo he dicho y lo voy a repetir: creo que deberíamos hacer un esfuerzo para dar un giro a la situación dada”⁷³⁵. Reafirmado, por lo demás, el éxito del 14-D y defendida a ultranza su tabla reivindicativa, también se tendría tiempo –previa denuncia de las conspiraciones contra la dirección de la UGT– para evidenciar la política anti-social del Ejecutivo. En cualquier caso, la principal novedad de la citada reunión sería que por vez primera se tomaría la decisión de solicitar el *voto* a ninguna candidatura de cara a las elecciones de junio al Parlamento Europeo. “Nuestro pronunciamiento no pretende reclamar el voto para ninguna candidatura en concreto”, se concluiría⁷³⁶.

Bloqueada y paralizada *de facto* la negociación, tendría lugar, entretanto, un hecho de no poca trascendencia a nivel simbólico dentro del movimiento obrero. Nos referimos, en concreto, a la celebración conjunta del 1º de Mayo por UGT y CCOO con comunicado unitario *ad hoc* y para el que se emplearía un título ya conocido: “Junto podemos”⁷³⁷. Un acontecimiento, por cierto, que no se había repetido desde 1982. El éxito de la manifestación no sólo afianzaría la ya alcanzada “unidad de acción”, sino que tendría otra lectura no menor:

⁷³³ AHFFLC, UGT, “Mesa de empleo. Valoración global de las propuestas del Gobierno”, Madrid, 18 de abril de 1989, pp. 1-4. Un documento que contenía asimismo un anexo dedicado a “Valoración del documento de la CEOE”.

⁷³⁴ Véase aquí al respecto: AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta al IV Comité Confederal ordinario”, Madrid, 22 y 23 de abril de 1988, sig.ant. B/53/35.

⁷³⁵ “Vamos a conseguir nuestras reivindicaciones. Intervención de Nicolás Redondo en el IV Comité Confederal”, *Unión*, nº 109, (1988), p. IV.

⁷³⁶ “Resolución del IV Comité Confederal ordinario de la UGT”, *Unión*, nº 109, (1988), p. 6.

⁷³⁷ UGT-CCOO, “Juntos podemos. Porque ya está bien”, *Unión*, nº 108, (1989), pp. 4-5.

ambas “confederaciones sindicales están descubriendo ahora que la pugna por la hegemonía puede ser reemplaza por una cooperación fructífera en la que ambas salen fortalecidas”⁷³⁸.

Un mes después de abrirse la *mesa de diálogo*, Apolinar Rodríguez, Secretario de Acción Sindical de UGT, le remitía una carta a Manuel Chaves firmada un 8 de mayo, fijando la posición conjunto de UGT y CCOO:

«Seguimos sin descubrir vuestra voluntad política para establecer la protección sindical a los contratos independientemente de su negociación puntual en la mesa. Nada sabemos sobre la toma en consideración de los criterios sindicales en la resolución del desarrollo del plan FIP. Por otra parte, la información remitida pendiente de contraste resulta parcial e incompleta y desde luego no permite abordar con rigor el temario convenido.

[...] Las declaraciones públicas del gobierno todavía han añadido mayor pesimismo a las posibilidades de compromiso de empleo».

Estas y otras cuestiones se denunciarían en aquella carta, con la decisión de que se anunciaría la intención de no volver a la mesa –convocada casi por sorpresa el viernes 5 de mayo de 1989 para el siguiente martes un 9 de mayo⁷³⁹– hasta que se diera cumplida contestación a toda una serie de interrogantes planteados⁷⁴⁰.

La semana que se abre un domingo 7 y finaliza el siguiente domingo 14 de mayo, terminará por confirmar el final de la lenta agonía de la mesa de empleo, que nunca gozó de *buena salud*. No obstante, siempre maniados por los *designios* de la coyuntura política, a prácticamente un mes escaso de la convocatoria a las elecciones al Parlamento Europeo, el PSOE pero también el Ejecutivo no podía permitirse el “lujo” de que la nueva concertación social se fuera al traste de forma tan rápida. No eran pocos los motivos. El primero, la Presidencia Española de la CEE durante el primer semestre de 1989. Segundo, ante los numerosos movimientos por parte de la derecha política, con AP y el CDS, con el objetivo de arrebatar toda una serie de alcaldía a los socialistas mediante un pacto político que no tenía precedentes. Y, en tercer lugar, ante la aparición pública de no pocos escándalos vinculados a pavorosos fraudes fiscales⁷⁴¹.

Ya en el terreno económico, mientras tanto, el Gobierno empezaba a *reaccionar* a los síntomas de recesión económica con el fin de enfriar la economía. De esta forma, prepararía un amplio *recorte* del gasto público –aconsejado por el Fondo Monetario Internacional– que tenía por objetivo luchar con la inflación. Un nuevo *giro liberal* que se concretaría en un paquete de medidas fiscales aprobadas en el Consejo de Ministros del 12 de mayo de 1988⁷⁴².

En paralelo a todo lo anterior, las cúpulas sindicales se encontraban cada vez más presionadas por parte de determinados sectores y también por parte de la militancia de base, de cara a iniciar un nuevo ciclo de protestas ante los escasos resultados del siempre publicitado *giro social*. De hecho, la paciencia de las direcciones de CCOO y UGT llegaría también a su fin

⁷³⁸ VEGA, Rubén, *La reconstrucción de...*, *op.cit.*, p. 249. Véase al respecto el reportaje que se publicaría en *Unión*, n° 109, (1989).

⁷³⁹ Noticia, “La mesa de empleo se volverá a abrir el próximo 9 de mayo”, *El País*, 6 de mayo de 1989.

⁷⁴⁰ AHFFLC, “Carta de Apolinar Rodríguez –Secretario de Acción Sindical de UGT– a Manuel Chaves –Ministro de Trabajo y Seguridad Social–”, Madrid, 8 de mayo de 1989, sig. 001876-002. Léase asimismo: CCOO-UGT, “Comunicado conjunto de CCOO y UGT ante la convocatoria de la Mesa de Empleo, el 8 de mayo de 1989 por el Ministerio de Trabajo”, consultable en, ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y...*, *op.cit.*, pp. 243-244.

⁷⁴¹ Noticia, Fernando Nadal, “Una bolsa de fraude de dos billones”, *El País*, 9 de mayo de 1989.

⁷⁴² Noticia, Concha Martín del Pozo, “El Gobierno estudia hoy un nuevo recorte en el gasto público de unos 115.000 millones de pesetas”, *El País*, 12 de mayo de 1989; Noticia, Concha Martín del Pozo, “El Gobierno adopta medidas fiscales ante una situación económica que califica de «complicada»”, *El País*, 13 de mayo de 1989; y, Editorial, “Enfriar la economía”, *El País*, 14 de mayo de 1989.

en aquellos días. Por ejemplo, Comisiones Obreras anunciaría que no está dispuesta a “seguir perdiendo el tiempo”, y denunciaba por boca de Agustín Moreno que la mesa de empleo se mantenía artificialmente abierta “por razones electorales”⁷⁴³.

Confirmado que no asistirían a la reunión del 9 de mayo, no obstante, desde el Gobierno decidiría mantener abierta la convocatoria. El *débil* argumento esgrimido en dicha ocasión por parte el propio Ministro de Trabajo sería la necesidad de “mantener el diálogo social”. Esperaría en vano una “reconsideración” de las *actitudes* de CCOO y UGT, pues, en caso de no asistir, tal decisión constituiría “falta grave de responsabilidad de difícil explicación”⁷⁴⁴. A la citada reunión, tan sólo asistiría la CEOE.

El mismo martes 9 de mayo, Nicolás Redondo escribía al “Estimado Presidente”, para advertirle de su “responsabilidad fundamental ante la situación de inoperancia que atraviesa la mesa de empleo, cuando el gobierno huye de un compromiso con los trabajadores”. Críticas y más críticas que se sumaban a no pocas evidencias que superado el *batch* del 14-D, aprobado el paquete de gasto social de primeros de abril, el Gobierno no tenía mayor voluntad en afrontar con seriedad y la profundidad necesaria aquella mesa de diálogo sobre el empleo. Una carta que concluía de la siguiente manera:

«Por razones de sentido común, más allá de efímeras posiciones de imagen y de campañas políticas, creemos que el gobierno debería abandonar la peligrosa senda de incumplimientos sociales y afrontar su compromiso pendiente con los trabajadores a favor del empleo»⁷⁴⁵.

No se conoce contestación alguna a la citada misiva. Iniciada la pre-campaña electoral la mesa de empleo moriría definitivamente. Una defunción confirmada a través de una simple *nota de prensa* de Trabajo a los pocos días de celebrarse las elecciones al Parlamento Europeo un 15 de junio de 1989. *Nota de prensa* “sin mediar comunicación alguna a los sindicatos”, tal y como se denunciaba en una carta dirigida desde la Comisión Ejecutiva de UGT a sus principales Federaciones y Uniones Provinciales.

Un texto en donde también se denunciaría: “La estrategia de convertir las mesas en un mero trámite previo, para luego desarrollar las iniciativas preconcebidas, pueden terminar arruinando el diálogo social en nuestro país”. La misma no terminaría ahí. En la citada *carta-circular* se volvería a repetir las denuncias tantas veces esgrimidas –así, por ejemplo, se criticaba la “pretensión” del gobierno de un “desarrollo más regresivo en formación profesional” o “la confusión con las subvenciones en la contratación indefinida”– al que se le acompañaría de un extenso informe en el que se repasaba como se había desarrollado la negociación⁷⁴⁶.

Superada *con nota* la convocatoria electoral al Parlamento Europeo en donde el PSOE obtendría más de seis millones de votos, y el 39,57%, con Fernando Morán como cabeza de lista; se retomaría el camino tantas veces emprendido en mayo de 1988, en octubre de 1988, en abril de 1989... Evidenciado empíricamente la invulnerabilidad del socialismo español en las urnas, pasado el *efecto político-social* del 14-D, UGT y CCOO tratarían de tomar otra vez la

⁷⁴³ Noticia, “Comisiones no está dispuesta a seguir «perdiendo el tiempo» en la mesa de empleo”, *El País*, 7 de mayo de 1989.

⁷⁴⁴ Noticia, Marta Zhein, “CCOO y UGT no acudirán hoy a la mesa de empleo”, *El País*, 9 de mayo de 1989.

⁷⁴⁵ AHFFLC, “Carta de Nicolás Redondo a Felipe González”, Madrid, 9 de mayo de 1989, sig. 001877-001. Véase también, Noticia, “Redondo responsabiliza a González de la inoperancia de la mesa de empleo”, *El País*, 10 de mayo de 1989.

⁷⁴⁶ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Carta dirigida a la atención del Secretario de Acción Sindical, Federaciones Estatales de Industria, Uniones Provinciales, Regionales y de Nacionalidad”, Madrid, 12 de junio de 1989, sig. 001877-001, acompañada del siguiente documento-informe: “Ayudas a la contratación indefinida. Cuadro de comparaciones”.

iniciativa del *giro social*. No sólo es que la ofensiva anti-sindical por parte del Ejecutivo no hubiera amainado, sino que continuaría con la permanente publicitación de la venta de sus éxitos económicos y políticos con el fin de legitimar su política económica en relación al nuevo ajuste previsto:

«Por ello creemos que frente al aluvión propagandístico que reciben los ciudadanos de nuestro país en relación con la política social y económica de este gobierno, teñido de autosatisfacción y falta de autocritica, y frente a la sistemática deslegitimación de nuestros análisis y reivindicaciones debemos mantener la práctica de comentar con serenidad y responsabilidad la realidad que contiene hoy, y de cara al futuro, las medidas que se toman y la situación económica social que vivimos».

El anterior párrafo corresponde a una Circular de la Comisión Ejecutiva de la UGT, fechada un 3 de julio. En la misma se haría balance del pasado reciente. Reclamado el éxito del 14-D, se señalaba asimismo como nos “reafirmarnos en las prioridades de una acción sindical tendente a lograr el giro social que hemos puesto como meta del sindicato para el próximo futuro”⁷⁴⁷. No tardaría en concretarse la respuesta.

Y como si se tratara de la repetición de una secuencia que parecía no tener fin, desde el Ejecutivo se daría, a partir de la primera semana de julio, otro nuevo *giro* en lo económico con un amplio recorte que incluía desde medidas financieras pasando por las monetarias hasta las fiscales con las que *enfriar* la economía. Tanto su contenido como la escenografía empleada mucho recordarían a la puesta en marcha del PEMP⁷⁴⁸. En paralelo, el mismísimo Solchaga reclamaba una nueva apertura de la concertación social que entonces parecía ser “más importante que nunca”⁷⁴⁹. La negativa por parte sindical sería, sencillamente, rotunda a lo que se llegaría a calificar como un *plan de estabilización* y mera “operación de marketing”⁷⁵⁰.

En este mismo escenario UGT y CCOO presentarían su conocida *Propuesta Sindical Prioritaria* (PSP). Un programa común de acción que se iría perfilando y completando hasta que en octubre de 1989 se diera a conocer su contenido definitivo. La inicial puesta en escena tendría lugar un jueves 6 de julio.

La PSP se convertiría en el programa de acción común sindical en adelante⁷⁵¹. Un programa de clara orientación socialdemócrata, con el que se pretendía recuperar la iniciativa política y que se encontraba sustentado en cuatro grandes ejes programáticos: a) aumento y mejora del empleo; b) mejora de la protección social; c) redistribución de la renta; y, d) derechos de participación de los trabajadores. Una iniciativa que, de forma sistemática, sería omitida desde el Gobierno y Trabajo de forma sistemática como ya ocurriera con las *170 medidas* de UGT. Los propios sindicatos explicarían en su día, como con la PSOE buscarían la “dinamización de la acción sindical” y a su vez la “unidad de acción con alcance ambicioso”, pero ante todo evidenciar la “viabilidad de la concertación social con vocación de progreso”.

⁷⁴⁷ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría General, “Circular nº 29”, Madrid, 3 de julio de 1989, sig. 001639-001, pp. 1, 6 y 7, respectivamente.

⁷⁴⁸ Noticia, “El Gobierno retirará 500.000 millones del mercado, en el más severo ajuste económico desde 1984”, *El País*, 8 de julio de 1989; y, Editorial, “Se acabó la fiesta”, *El País*, 9 de julio de 1989.

⁷⁴⁹ Noticia, “Los sindicatos no pactarán la política de ajuste que planea el Gobierno”, *El País*, 5 de julio de 1989. Y unos días después, Noticia, Carmen Parra, “Nicolás Redondo acusa al Gobierno de haber endurecido su política económica después de las elecciones europeas”, *El País*, 8 de julio de 1989.

⁷⁵⁰ Noticia, Carmen Parra, “UGT no consensuará los Presupuestos de 1990, que prevé que sean «un nuevo plan de estabilización»”, *El País*, 4 de julio de 1989

⁷⁵¹ Véase la valoración que realizaría sobre la PSP, CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, *op.cit.*, y en concreto el apartado “1.3. La Propuesta Sindical Prioritaria: la estabilidad en el empleo primer objetivo sindical” (pp. 215-ss.).

La *ofensiva sindical* se ponía en marcha frente a la constante y agresiva *campaña de imagen* del Gobierno⁷⁵², que cierra la “puerta a negociaciones o consultas trascendentes”. Un “gobierno [que] tiene un concepto auxiliar del sindicato, como instrumento solo para el ajuste”. Mostradas las debilidades del sistema económico imperante –al que se calificaría de “frágil y regresivo” – se apostaría por una profunda remodelación de la política de empleo, de cara a luchar contra la precarización y la temporalidad laboral⁷⁵³.

Los siempre mencionados tiempos del *giro social* tocaban a su fin de forma definitiva. No obstante, un último acontecimiento terminaría por confirmar su defunción absoluta en un ejemplo de *tenacidad* sin igual, pero sobre todo de una imperturbable voluntad política de avanzar en la flexibilidad laboral destinada a los jóvenes, aunque el precio fuera hacer *saltar por los aires* cualquier canal de diálogo, con el riesgo añadido de abrir nuevos escenarios potencialmente conflictivos.

Remarcados todos estos antecedentes, el 26 de julio de 1989 desde el Ministerio de Trabajo se presentaba un borrador para incentivar el empleo juvenil, a partir de la experiencia del Real Decreto 799/1985. Sin darse “por aludidos” por las críticas pasadas y presentes, se trataría de retomar el *diálogo social*, que como hemos visto llegaría a ser reclamado por el propio Solchaga. Eso sí, en un formato inusual pues se argumentaría a la par que se justificaría que aquel enésimo intento en pos de un replanteamiento de lo expuesto en la primavera de aquel mismo año. Además, la propuesta llegaba en un momento sin margen de reacción ni de respuesta. A finales de julio, y a la espera de la llegada mes de agosto. Tiempo en que tradicionalmente se paralizaba la vida política y sindical del país.

En la carta que acompañaba al “Proyecto de Real Decreto por el que se establecen incentivos a la contratación laboral de carácter estable”, por más que se repitieran argumentos, el *tono empleado* ya no era el del pasado. No había *sugerencias* sino el pre-proyecto de un RD. Con todo, se dejaba abierta la puerta a escuchar a las organizaciones más representativas, aunque no se asegurara diálogo ni menos negociación.

«La ausencia de acuerdo no obsta para que se abra un periodo de consultas por escrito con el fin de que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas pueden hacer llegar sus criterios al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, antes de someter a la versión definitiva del anteproyecto del Real Decreto al dictamen del Consejo de Estado».

El mensaje era claro. El Gobierno cerraba la puerta a la apertura de cualquier mesa de negociación o diálogo social. Se limita, pues, a cumplir los requisitos jurídicos pertinentes establecidos en el artículo 17.3 del ET, en donde se exponía en su último párrafo lo siguiente: “Las medidas de fomento al empleo integradas por subvenciones, desgravaciones y otras ayudas

⁷⁵² Por su parte la UGT advertiría: «El argumento, tantas veces repetido, de que con nuestra actitud estamos haciendo el juego a la derecha y propiciando su advenimiento es rotundamente falso, como se han encargo de mostrar las últimas elecciones. Lo que en cambio sí es muy cierto es que si el Gobierno reconociera la justicia de las reivindicaciones sindicales y actuara en consecuencia, su política recobraría una credibilidad socialdemócrata que hoy tiene perdida, y el Partido Socialista recuperaría para su proyecto originario una parte importante del electorado progresista que desde 1982 acá ha ido apartándose inexorablemente de él». Editorial, “Por unas reivindicaciones justas”, *Unión*, nº 110, (1989), p. 3.

⁷⁵³ AHFFLC, UGT-CCOO, “Propuesta sindical Prioritaria”, Madrid, 6 de julio de 1989, pp. 7-10, respectivamente. El texto definitivo se presentaría –como se ha adelantado– en octubre de 1989. El mismo puede localizarse, entre otros lugares, en, VEGA, Rubén, *La reconstrucción de..., op.cit.*, pp. 355-360; y también en *Unión*, nº 110, (1989), pp. 4-8, en donde se volvería a mostrar la consabida capacidad del órgano de expresión principal de UGT de evitar que saliera el logo de CCOO en la portada del citado medio, inclusive en tiempos de la llamada ‘unidad de acción’. Léase también: Editorial, “La fuerza de una propuesta”, *Unión*, nº 111, (1989), p. 3. El programa completo también se publicaría en un número extraordinario de *Unión*, (1989) fechado en el propio mes de octubre. Véase asimismo, Noticia, Carmen Parra, “UGT y CCOO definen el giro social y su alternativa a la política del Gobierno”, *El País*, 7 de julio de 1989.

se establecerán por el Gobierno previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”⁷⁵⁴. El modelo de concertación social tantas veces ensayado como tantas veces frustrado era ya pasado. Una nueva etapa se inauguraría, aunque todavía no se conociera ni sus objetivos ni sus características. En cualquier caso ya se podía intuir las *voluntades políticas* que lo sustentaban.

Asimismo en la citada misiva se informaría como la principal novedad estriba un incremento de las subvenciones y otro tipo de ayudas que se plasmarían en los siguientes PGE. “Dadas las fechas”, se indicaba, “parece conveniente que la fecha límite para la remisión de observaciones sea el día 8 de septiembre”⁷⁵⁵.

Así pues, no se introducirían novedades mayores en aquel proyecto de RD que las anteriormente fijadas. Quizás se especificaba con precisión los mecanismos de concesión de las ayudas a las empresas de cara que “contraten por tiempo indefinido a trabajadores”, cuya cuantía se veía disminuida de 900.000 a 600.000 pesetas. También habría que destacar como se ampliaba el concepto de jóvenes que pasaban de los 25 años hasta los 30 años en una clara muestra de la prolongación de la edad juvenil, como de la propia desestructuración de las biografías laborales una vez instalada y consolidada la *cultura de la temporalidad*⁷⁵⁶.

La respuesta inicial por parte CCOO y UGT sería de sorpresa más por las formas y los mecanismos que por los contenidos. Nos explicamos. Cerrada la posibilidad de abrir una mesa de diálogo y reducidas las posibles respuestas a la formula de consultas, se constituiría en la confirmación definitiva que desde el Ejecutivo no se pretendía retomar *diálogo social* alguno. Pero también en relación a los propios contenidos, la posibilidad de un posible acuerdo era, en la práctica, casi imposible por los amplios márgenes de diferencia entre los agentes sociales y el propio Gobierno. Todos sabían desde donde partían y hasta donde estaban dispuestos a transigir.

A la vuelta del verano del ochenta y nueve, tras las meditaciones oportunas de González sobre si convocar o no convocar elecciones anticipadas y tomada la decisión de celebrarlas el 29 de octubre⁷⁵⁷; desde la UGT se contestaría en forma y plazo a la propuesta presentada desde Trabajo. Por más que las formas no hubieran sido las esperadas, aquella propuesta, por primera vez, en mucho tiempo no sería rechazada frontalmente por el sindicato socialista, aunque tampoco iba a ser aceptada.

Realizado el oportuno repaso por los *males* que aquejaban al mercado de trabajo, en donde se destacaba al mismo nivel tanto la “generalización del fraude contractual” como los efectos del “abandono del principio de casualidad en la celebración de los contratos”, no se veía posibilidad de avanzar en ningún consenso, “si [se] mantiene este estrecho procedimiento de una mera consulta por escrito para mal cumplir una obligación del Estatuto [de los Trabajadores]”. Reclamada la negociación ante la “plena fuerza moral” que asistía a los sindicatos, se advertía como no renunciarían a negociar el RD por los mecanismos que fuera posible y viable. Se adjuntaba en dicha carta de contestación una *nota adjunta* valorativa de la propuesta de RD. Una *nota* en donde no se observa cambios sustanciales como se ha advertido ni un *giro* en política de empleo: “En definitiva, creemos que este proyecto mantiene la

⁷⁵⁴ Véase aquí el apartado “9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. *Los arduos inicios de la flexibilización* (octubre 1976-marzo 1980)”.

⁷⁵⁵ AHFFLC, “Carta de Álvaro Espina –Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales– al Sr. Nicolás Redondo –Secretario General de la Unión General de Trabajadores”, Madrid, 26 de julio de 1989, sig. 001877-001.

⁷⁵⁶ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Proyecto del Real Decreto por el que se establecen incentivos a la contratación laboral de carácter estable*, Madrid, julio de 1989. Documento localizado en el fondo de AHFFLC, “Circulares de la Secretaria de Acción Sindical”, sig. 001877-001. Véase también, Noticia, Carmen Parra, “El Gobierno rebaja de 900.000 a 600.000 pesetas las ayudas por contrato fijo”, *El País*, 27 de julio de 1989.

⁷⁵⁷ Noticia, “Felipe González «reflexiona» sobre el adelanto de las elecciones”, *El País*, 26 de julio de 1989

pasividad de la Administración respecto al control, que tan negativos resultados ha producido en nuestro país”⁷⁵⁸.

El último proyecto presentado del RD en materia de contratación *caería* en las siguientes semanas en el olvido, hasta su abandono definitivo. Eran tiempos de elecciones generales⁷⁵⁹. No habría contestación ni negociación en torno las demandas sindicales expuestas. Mientras tanto, en aquel marco de operaciones CCOO y UGT reforzarían tanto su unidad de acción como modelarían su propuesta del PSP⁷⁶⁰. De hecho, justo un día después, el sábado 9, UGT daba a conocer unos de sus documentos más duros contra la política económica socialista: *El recalentamiento de la economía, una visión alternativa*⁷⁶¹.

A la hora de realizar un posible balance, y visto todos los acontecimientos históricos que jalonan la salida del propio 14-D hasta septiembre de 1989, muy difícilmente se puede hablar de cualquier tipo de “pago de la deuda social”. Ello con dos conclusiones notables, entre otras muchas: un tímido *giro social* por parte de un acuciado Gobierno en relación al incremento de las partidas presupuestarias, sin verse obligado a modificar los fundamentos de su política económica, y que no contaría, en momento alguno, con la aprobación de los impulsores del 14-D; y segundo lugar, tampoco se modificaría las bases normativas de la política de empleo, que habían conducido a la temporalización y precarización del mercado laboral. Inclusive se podía añadir otra tercera conclusión: el 14-D más allá de su impacto inicial, tampoco conduciría a un *cambio* en las formas de entender y desarrollar el diálogo social. Al contrario, con el 14-D moriría, de una vez por todas, el siempre renqueante modelo de concertación social que en la práctica, ofrecería sus principales resultados entre 1979-1984, y que venía agonizando desde finales de 1986.

Y pese a todo, el mal denominado *giro social* sería nombrado de forma permanente, cuando se avecinaba a toda prisa la crisis económica de los primeros noventa, como ejemplo de un desmedido *gasto social* por parte de los ejecutivos socialistas⁷⁶². Un *gasto social* que se

⁷⁵⁸ AHFFLC, “Carta de Apolinar Rodríguez –Secretario de Acción Sindical– a Álvaro Espina – Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales–”, Madrid, 8 de septiembre de 1989, sig. 001877-002.

⁷⁵⁹ De nuevo UGT no solicitaría el voto para ninguna candidatura. Véase, UGT-CF, “Resolución del Comité Confederal extraordinario, celebrado el 15 de septiembre de 1989”, *Unión*, nº 111, (1989), pp. 4-6. Y en concreto, “Opinión de UGT ante la anticipación de las elecciones, incumplimientos del Gobierno”, *Unión*, nº 111, (1989), p. 22. Tal era la situación que incluso en el siguiente número de *Unión* se evitaría felicitar al PSOE por su victoria. Así se podía leer: «Por otra parte, el análisis de los resultados electorales del 29 de octubre parece indicar que en el Parlamento que se constituya, próximamente, podrá darse un juego político más vivo, y, en consecuencia, una oposición que cumpla más eficazmente el importante papel institucional que a ella le corresponde, con lo que dejará de imputarse a los sindicatos – como sin fundamento ha venido haciéndose últimamente– la pretensión de sustituir a los partidos políticos en las funciones que les son propias». Editorial, “Las cuestiones que importan”, *Unión*, nº 112, (1989), p. 3. También por aquellas fechas tendría lugar el VII Comité Confederal ordinario, en donde se apostaría fuertemente por el desarrollo de la PSP así como se convocaría el XXV Congreso Confederal, que finalmente se celebraría en abril de 1990.

⁷⁶⁰ Noticia, Marta Zhein, “Las ejecutivas de UGT y CCOO exigen al Gobierno que cumpla con los pensionistas, funcionarios y parados”, *El País*, 6 de septiembre de 1989; Noticia, Marta Zhein, “La Ejecutiva de UGT decide mantener la unidad de acción con CCOO”, *El País*, 7 de septiembre de 1989; Noticia, Marta Zhein, “Los compromisos sociales pendientes costarán al Gobierno 457.000 millones, según UGT”, *El País*, 9 de septiembre de 1989.

⁷⁶¹ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Reivindicativa, “El recalentamiento de la economía. Una visión alternativa”, Madrid, 8 de septiembre de 1989, sig. 001877-002. Véase también, Noticia, “La política «neoliberal» del Gobierno ha fracasado, denuncia un informe de UGT”, *El País*, 10 de septiembre de 1989.

⁷⁶² Léase, con atención, lo que afirmaría en este sentido Javier Astudillo: «Finalmente, lo irónico del caso es que, como algunos economistas y científicos sociales españoles atribuyen gran parte de la responsabilidad de la distorsión de la política económica del Gobierno al incremento del gasto social

convertiría en la primera la víctima de la crisis económica, a través de toda una serie de normativas no sólo que desactivarían y borrarían el breve como efímero *giro*, sino que se culpabilizaría al mismo como el origen de todos los males por los que atravesaba la economía, según la versión liberal hegemónica de la época. Una interpretación, por cierto, bastante resistente al tiempo, por más que desde la UGT y CCOO a través de decenas de informes, se pusieran al descubierto los límites e insuficiencias, pero sobre todo el carácter cortoplacista del mismo. Pero llegados aquí ya hemos comprobado, en más de una ocasión, como las siempre moderadas tesis sindicales apenas han trascendido ni ocupado un lugar importante en los grandes relatos sobre la época socialista.

No terminaron aquí las secuelas del 14-D. En paralelo, habría otra gran consecuencia de un sobresaliente calado histórico: la ruptura definitiva del modelo de relaciones Partido-Sindicato. Un hecho siempre destacado. No obstante, lo que no se ha resaltado con tanto ahínco, han sido las otras *consecuencias* a nivel político-estratégico del PSOE tras la consumación del *divorcio* con UGT y el éxito del 14-D.

Después de la reacción inmediata –y un tanto virulenta– por parte del CF del PSOE en enero de 1989 tras la convocatoria de huelga general, iría tomando acomodo entre los *estrategas*, “soportes intelectuales” y una no desdeñable parte de la dirigencia socialista, un cambio de calado tanto a nivel político como identitario. Nos referimos a la disolución de la identificación del Partido Socialista Obrero Español con la clase obrera y/o trabajadora como principal referente *de clase*. Un camino que ya había sido ensayado en el 31º Congreso socialista⁷⁶³.

Puede parecer este un cambio menor, cuando se examina la propia economía política del socialismo, paso a paso, etapa por etapa. O, sin ir tampoco muy lejos, ante las mismas formas de ejercer el poder político o de representar el proyecto socialista

Así pues, en realidad para finales de los noventa, sobre todo si partimos de una visión a medio plazo –al menos desde la *salida* por la que se opta en 1979 y en 1981 tras el XXXVIII y el XXIX congresos– el Partido estaba lejos, muy lejos, de cualquier cultura política identificada con la vieja centralidad obrerista. Ahora bien, el trauma, primero, de la ruptura de la familia socialista, y el posterior *shock* del 14-D, facilitarían enormemente el dar este pequeño paso a nivel simbólico con el que se finiquitarían viejas inercias pero ante todo se reforzaría la identificación del PSOE como el *partido de la modernización*⁷⁶⁴. Tampoco era sostenible –cuando no palpablemente contradictorio– combinar y menos argumentar la defensa de su política económica con *desfasadas* lealtades y *caducos* imaginarios colectivos.

Había llegado la hora dotarse de un *nuevo necesario ropaje teórico*, al menos, de puertas para afuera. No faltarían los “compañeros” siempre dispuestos y predispuestos a la tarea, a partir de una lectura en donde se combinaría un análisis sobre la nueva composición de la estructura social de la España de finales del último cuarto del siglo XX, acompañada por de redefinición del papel a desarrollar por los agentes sociales. *Agentes sociales* en donde el

pedido por los sindicatos, si UGT y CCOO sólo se hubieran preocupado realmente de las rentas salariales de sus afiliados, la política fiscal del gobierno no hubiera sido tan expansiva y el déficit público hubiera sido menos difícil de contener. Un sindicalismo auténticamente pequeño, preocupado sólo por sus afiliados, hubiera resultado más económico y fácil de satisfacer; el PSOE se habría evitado así al menos gran parte de los enfrentamientos de otoño de 1987 y habría habido menos motivos para la huelga general de 1988». ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, op.cit., pp. 360-361. En ese sentido, Carles Boix hablaría como el *pago social* habría alterado «en parte la estrategia gubernamental de intensificar la inversión pública». BOIX, Carles, *Partidos políticos, crecimiento...*, op.cit., p. 220.

⁷⁶³ Véase lo apuntado en las *nota 502*, *nota 503* y *nota 504*, entre otras.

⁷⁶⁴ Nos remitimos a lo apuntado en el apartado “4.1. «El partido de la modernización»: las raíces políticas, ideológicas y culturales de la *metamorfosis* del PSOE”.

movimiento sindical aparecía como un ente anti-moderno, apegado a viejas formas de comportamiento y en base a ancladas en estrategias desfasadas⁷⁶⁵.

Si bien en el terreno de lo teórico o de lo eminentemente empírico aquello tendría un *débil* fundamento, sería, en extremo, útil para los fines propuestos. Más todavía cuando se abandonaría, definitivamente, la lucha por tratar de combinar la hegemonía política con la social⁷⁶⁶. La única legitimidad válida para el socialismo modernizador procedía de las urnas.

Esta labor de *poda ideológica* se completaría con la reactivación del Programa 2000, que se había visto cortocircuitado a la salida del 31º Congreso⁷⁶⁷ y que sería retomado, oportunamente, a principios de 1990 por el propio Alfonso Guerra⁷⁶⁸. Todo ello por más que no dejará de ser, nuevamente, contradictorio –o al menos aparentemente chocante– que se pretendiera refundar el ideario socialdemócrata de la organización y al mismo tiempo eliminar el perfil obrerista. Cosas de la *modernidad socialista*.

Un nuevo impulso del socialismo sería el eslogan elegido de cara a la celebración del XXXII Congreso del PSOE, que tendría lugar los días 9 y 11 de noviembre de 1990. Espacio en donde concluiría tal operación de ingeniería político-ideológica. Para entonces, el desgaste político pero también a nivel de imagen del Ejecutivo –y con él del Partido– era una realidad y un hecho a tener en cuenta. Especialmente teniendo en cuenta los signos de recesión económica, los constantes casos de corrupción, la cada vez más clara interrelación entre los GAL y determinados niveles ministeriales, así como decisiones de calado como la participación en la primera Guerra del Golfo.

A pesar de que, una vez más, la tesis de la *invulnerabilidad electoral* se había mostrado cierta⁷⁶⁹, el declive de la pujanza electoral también era un factor a valorar oportunamente. Y

⁷⁶⁵ Incluso el adalid de lo *social* dentro del socialismo español no dudaría en afirmar poco tiempo después: «Es que hay un sector del partido, un sector socio liberal, o como se le quiera llamar, que lo forman enemigos de los sindicatos. Este sector lo que quiere es liquidar los sindicatos, mientras que otros estamos en otras posiciones y no queremos eso para nada. Pero esto no es un tema de prudencia política. Esto es la influencia de Reagan, es el reaganismo, es la idea que los sindicatos están periclitados y que ya no tienen función en la vida. Y eso no es verdad, aunque la vida ha cambiado mucho y las organizaciones sindicales y políticas tienen que cambiar mucho». Alfonso Guerra en declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, op.cit., p. 137.

⁷⁶⁶ Véanse aquí los trabajos de, PARAMIO, Ludolfo, *Tras el diluvio...*, op.cit.; y concretamente, id., “Los sindicatos y...”, op.cit.. Y a la *salida* del citado Congreso, véase la nueva redefinición en materia de política de alianzas que Paramio dibujaría: id., “Trabajadores y ciudadanos: el socialismo y los movimientos sociales”, *Sistema*, nº 98, (1990), pp. 47-56. Asimismo consúltense las opiniones de uno de los antiguos hombres fuertes en su día dentro de UGT –entonces considerado como uno de los ‘peones’ del PSOE dentro de la central ugetista– y que saldría de la dirección del sindicato socialista, precisamente, ante la ruptura de la misma: ZAMBRANA, Justo, “El modelo sindical y la democracia industrial en España”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 83-92.

⁷⁶⁷ Sobre su primera formulación a nivel de textos congresuales: “4.4. El debate teórico y estratégico en el socialismo español” en AHFPI, PSOE-CE, “31º Congreso del PSOE. Informe Político. Memoria de Gestión, 1984-1987”, Madrid, enero de 1988, sig. C 659, t1, pp. 27-30. Por lo demás, véase, la *cancha* que tendría la presentación y el desarrollo del mismo en las páginas de *El Socialista* desde 1988 a 1990. Y, por lo demás, GINER, Salvador, LEGUINA, Joaquín, TEZANOS, José Félix, “Transformaciones sociales y apoyos estratégicos del proyecto socialista”, *Leviatán*, nº 35, (1989), pp. 84-100.

⁷⁶⁸ Noticia, Luis R. Aizpeolea, “Guerra dirigirá la reactivación del Programa 2000”, *El País*, 3 de enero de 1990. Allí se señalaba como desde el primer borrador elaborado se habían «recogido las sugerencias de las aproximadamente 60.000 personas que han participado en el debate, según aseguran fuentes socialistas». Véase Capítulo 2, *nota 407*.

⁷⁶⁹ Así se seguía manteniendo: «La actual hegemonía del PSOE se sitúa en las coordenadas política precisas de una correlación de fuerzas que no parece presentar perspectivas inmediatas de modificaciones importantes [...]. Por otra parte, las intenciones de voto permanecen bastante estabilizadas, con el PSOE

pese a todo, durante el 32º Congreso del PSOE no faltaría la habitual auto-glosa ante los grandes pasos dados en pos de la “misión histórica” del socialismo español. La *fe política* en la estrategia de la modernización aparentemente se mantenía inalterada:

«Después de una década de gobierno socialista España habrá entrado plenamente en una nueva etapa de su historia. Con un gobierno estable y firme se habrá consolidado un período de modernización y de normalización política y social, se habrá mantenido un ritmo alto de crecimiento económico y se habrán impulsado sólidas políticas sociales de progreso»⁷⁷⁰.

En palabras de los propios socialistas se abría una nueva etapa que se denominaría a partir de entonces como el “período de consolidación de la opción socialista en España”, y cuya meta más inmediata era llegar en la mejor de las condiciones posibles a los acontecimientos de 1992. Se estaba ante,

«un período en que el debíamos ser capaces de perfilar nuestras líneas futuras de desarrollo programático y en el que debíamos ser capaces de superar aquellos obstáculos políticos que verosímilmente nos íbamos a encontrar»⁷⁷¹.

Para a continuación remarcar como “los objetivos y metas de este período de gestión, y de esta tercera legislatura socialista –que tiene una fecha simbólica importante en el horizonte 92– no terminan en 1992, sino que forman parte de una tarea de más largo plazo, que no se agota ni muchos menos en una década”⁷⁷². Así pues, se mantenía la perspectiva planteada en el tantas veces citado *Documento de Estrategia* de 1983. Allí se plantearía como para alcanzar todos los objetivos de su *misión histórica*, cuanto menos los socialistas deberían seguir al frente del Ejecutivo durante un cuarto de siglo. En noviembre de 1990, por tanto, algo menos faltaba para el cumplimiento de tales designios⁷⁷³.

Sin embargo, en este *único camino* se había tropezado con alguna que otra *piedra* o más concretamente, según el lenguaje político socialista del momento, con una serie de “elementos conflictivos”. Y ahí aparecía la huelga del 14 de diciembre en un plano más bien secundario. “¿Dónde está el 14-D y dónde están los problemas de corrupción?”, preguntaría el representante de Izquierda Socialista, Antonio García Santesmases, durante el propio Congreso socialista⁷⁷⁴.

situado en primer lugar de preferencia a una gran distancia de los restantes partidos políticos, mientras que otros partidos de la oposición incluso registran descensos significativos». AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, p. 15.

⁷⁷⁰ AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, pp. 8-9. Véase asimismo el *Informe Político* que se presentarían al citado Congreso por parte de la CEF del PSOE y en donde se continuaría con la línea de ‘no’ autocrítica: “Informe Político (1)”, *El Socialista*, n° 509, (1990), pp. 1, 3-14; y, “Informe Político (y 2)”, *El Socialista*, n° 510, (1990), pp. 1, 3-14. En cuanto a los datos económicos *puros y duros* la organización socialista publicaría un extenso dossier en el también tradicional formato empresarial: AHFPI, PSOE, “Una sociedad que avanza. 32 Congreso, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 914.

⁷⁷¹ AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, p. 8. De cara a aproximarse a la mitificación pero también al *simbolismo* que los socialistas dieron a la citada efeméride: BARÓN, Enríque, “El horizonte 92 y la izquierda”, *Leviatán*, n° 36, (1989), pp. 21-32.

⁷⁷² AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, p. 9.

⁷⁷³ AHFFLC, PSOE-CEF, “Documento de estrategia”, Madrid, octubre de 1983, sig. AI-647-08.

⁷⁷⁴ Noticia, Enric Company, “Izquierda Socialista, única fuerza crítica con la intervención del secretario general”, *El País*, 10 de noviembre de 1990.

Por más que tiempo después se llegará a afirmar como el *desencadenante* del 14-D sería una “gran estupidez” en boca de Felipe González⁷⁷⁵; en aquellos precisos días se rebajaría el tono, así como tampoco se la iba a otorgar mayor audiencia:

«En este contexto general de realizaciones positivas, no debemos dejar de reconocer también la existencia de algunos elementos conflictivos, entre los que llegó a tener una significativa importancia, la huelga general del 14 de Diciembre de 1988. Huelga que se produjo precisamente en un momento en que nuestro Partido estaba abriendo una nueva fase de gobierno, caracterizada por un mayor énfasis en las políticas sociales y redistributivas, una vez que habíamos logrado con éxito los objetivos de las anteriores fases de saneamiento y de impulso económico»⁷⁷⁶.

Sin entrar en mayores disquisiciones de las estrictamente necesarias acerca del contenido del PEJ, se seguiría defiendiendo su oportunidad y así como se continuaría presentándolo como una mera cuestión técnica cuya idoneidad no parecía cuestionable:

«El Plan elaborado por la dirección del Partido Socialista no consistía en otra cosa que en una iniciativa de puesta en práctica de una modalidad incentivada de contrato de inserción laboral para jóvenes. Dicha propuesta había sido objeto de un cuidadoso estudio de evaluación previa, que se basó, por una parte, en los datos fundamentales de la realidad española, y por otra parte, en las experiencias similares iniciadas en otros países, así como en las propuestas formuladas anteriormente por otros partidos»⁷⁷⁷.

Sobre la propia convocatoria del 14-D tenían fundadas sospechas los socialistas de que la misma obedecía, en realidad, a otras motivaciones más profundas. No se llegaba a hablar de una gran conspiración anti-socialista como había sido nota común, pero tampoco se descartaba, totalmente, dicha hipótesis. Así se mantenía, primero, como dicho paro general pretendió “erosionar” políticamente al Ejecutivo. Y, segundo, la propia convocatoria obedecía al intento de defensa de los intereses particulares de los sindicatos⁷⁷⁸. Lo que todo sumado y removido oportunamente llevaba a una gran conclusión: “En este contexto preciso es el que el famoso proyecto de Plan de Empleo Juvenil se convirtió, en cierto modo, en un mero pretexto para la convocatoria de la huelga”⁷⁷⁹. Y lo que todavía era mucho más grave: con aquella convocatoria de huelga general se había intentado cuestionar “la funcionalidad normal y legítima de las Instituciones propias de una democracia”. Lo que termina por conducir al siguiente planteamiento de principios:

«[N]i los sindicatos, ni ningún otro grupo social o de intereses puede suplantar la voluntad soberana, representada en el Parlamento, con una dinámica de movilización social permanente. En una democracia bien establecida ‘la calle’ nunca puede suplantar al Parlamento,

⁷⁷⁵ Véase la *nota 418*.

⁷⁷⁶ AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, p. 6. Y con respecto a la *salida* adoptada se decía: «En un país como el nuestro, cuyo futuro queremos afrontar desde las coordenadas de un riguroso proyecto de transformación socialista de largo plazo, la dinámica de los acontecimientos que giraron en torno a la huelga del 14-D determinaron la necesidad de madurar con urgencia opciones suficientemente sólidas y coherentes para hacer frente a los desajustes en el funcionamiento del modelo de Estado de Bienestar que se hacían notar también en los países desarrollados de nuestro entorno, y que demandaban adaptaciones políticas sociales, laborales y demográficas (p. 6).»

⁷⁷⁷ AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, p. 10.

⁷⁷⁸ Al respecto léase atentamente el apartado “4.5) De la confrontación al diálogo social” en AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, pp. 23-26, en donde se podía llegar a leer como «las centrales sindicales mayoritarias articularon una estrategia orientada a alcanzar un mayor protagonismo en la actividad política, e incluso parlamentaria».

⁷⁷⁹ AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, p. 10.

ni a las restantes Instituciones democráticas. La única manera de cambiar el rumbo en un país democrático es mediante las urnas, en un proceso de decisión claro, en el que todos tengan garantizada la oportunidad de decidir libremente la política económica y social que consideren más conveniente o más efectiva»⁷⁸⁰.

La escenografía con la que se presentaría y se desarrollaría el XXXII Congreso socialista, formaba entonces parte de los lugares comunes de la vida política del país. Una puesta en escena cuya fuerza pública y mediática residía en presentar al Partido unido, con un proyecto común sin fisuras y con un balance de gestión positivo. Con todo, la *procesión iba por dentro*.

El resultado de las discrepancias entre las dos principales sensibilidades socialistas –la liberal, representada por Carlos Solchaga y la *social* y/o pretendida *socialdemócrata* por parte de Guerra– a la hora de conformar la futura CEF constituían, en apariencia, la única cuestión no atada previamente a la celebración del mismo⁷⁸¹. Lo que también parecía, prácticamente, seguro era que Txiki Benegas saldría reforzado del mismo por más que su *perfil político* se hubiera visto seriamente cuestionado durante el antes y el después del 14-D⁷⁸².

Pero sin alejarnos de las *apariencias* así como de significativos *silencios*, y pese a que se mantuviera, por activa y por pasiva, que se llegaba al mismo sin “conflictos ideológicos”⁷⁸³; las maniobras previas “no” públicas venían siendo una constante en medio de “discusiones retóricas y semiclandestinas”, como apuntó en su día Alfonso S. Palomares⁷⁸⁴. Seriamente tocado el todavía Vicepresidente del Gobierno por el estallido del *caso Guerra*⁷⁸⁵, dichos *movimientos* tanto dentro del Partido como fuera aumentarían en los días previos a la inauguración del Congreso, de cara a apartarle de sus responsabilidades o al menos debilitar su omnímoda posición⁷⁸⁶. Sin embargo, dichas conspiraciones tan sólo eran la *punta del iceberg* de otra serie jugadas internas de mayor calado, relacionadas con el intento de configurar *nuevas* mayorías dentro de determinados bloques dominantes en el seno del PSOE.

⁷⁸⁰ AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 912, pp. 10-11. Al respecto resulta de interés atender a las posteriores afirmaciones de Redondo al respecto: «Es que era indeseado nuestro papel de oposición política. No lo queríamos porque tenemos una función como sindicato. Los ministros confrontaban la legitimidad de las urnas con las huelgas generales, pero ¿por qué? Nosotros tenemos tanta legitimidad para convocar una huelga, que es un derecho constitucional, como la legitimidad que las urnas le dan a los partidos. Cuando hicimos la huelga de mayo de noventa y dos, decía que los sindicatos estaban en contra del Parlamento. Confrontaban la legitimidad de las urnas, que es muy respetable, con otra legitimidad que era igualmente respetable». En declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, op.cit., pp. 215-216.

⁷⁸¹ Noticia, Anabel Díez, “La batalla por la apertura de la ejecutiva, única duda del 32º Congreso del PSOE”, *El País*, 2 de noviembre de 1990; Noticia, Anabel Díez, “Benegas cita a dirigentes regionales para saber su opinión sobre la nueva ejecutiva del PSOE”, *El País*, 7 de noviembre de 1990.

⁷⁸² Noticia, Juan González Ibáñez, “Benegas reforzará su papel de coordinador general con competencias delegadas de González y Guerra”, *El País*, 8 de noviembre de 1990. Consúltase el posicionamiento político-estratégico que daría el propio Benegas a tal citada congresual en: BENEGAS, José M^a, “El fin de una etapa, el comienzo de un tiempo”, *Leviatán*, nº 40, (1990), pp. 5-14.

⁷⁸³ Noticia, Luis R. Aizpeolea, “Hoy se abre un congreso socialista atado y con escasas incógnitas que despejar”, *El País*, 9 de noviembre de 1990.

⁷⁸⁴ PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González...*, op.cit., p. 362.

⁷⁸⁵ Véase la nota 424.

⁷⁸⁶ Por aquellos días Alfonso Guerra se desahogaría en el programa de la SER, *A vivir, que son dos días*. Tras las consabidas denuncias contra los *intentos* de moverle del sillón, afirmaría como «hay operaciones extrañas, subterráneas, de auténtica obsesión» contra su figura. Terminando por calificar a tales sujetos como «descerebrados». Noticia, “Guerra califica de «enfermos» a los que quieren apartarle de Felipe González”, *El País*, 4 de noviembre de 1990.

Valorado como un bien de *primera necesidad* la estabilidad y el control de la organización en el fluir de la vida orgánica del Partido⁷⁸⁷, los mecanismos de vigilancia y coerción volverían a funcionar de forma razonable a lo largo del proceso congresual⁷⁸⁸. Con todo, lo que no se podía garantizar era el control hasta el último detalle o destapar cada conspiración.

Antes de entrar en más detalles de las operaciones que se desarrollan entre el sábado 9 al domingo 11 de noviembre de 1990, deben de apuntarse un conjunto de notas. Primero, la relativa tranquilidad a nivel público y a nivel informativo que prevalecería en los días previos – tal y como se acaba de mantener– sin declaraciones altisonantes o conflictivas, incluidas las de la UGT quienes observarían el mismo desde un lugar distante. Y no era lo anterior un asunto menor, teniendo presente los antecedentes de otras citas congresuales. A reforzar aquella aparente *calma* contribuiría también el principal medio de comunicación de la nación. Así *El País* evitaría “dar coba” a las posiciones disidentes o críticas, publicando tan sólo una pequeña serie de artículos con mayoritaria presencia de los oficialistas de todo tipo y condición⁷⁸⁹, sumado a una entrevista al entonces *disidente* Joaquín Almunia⁷⁹⁰. Tampoco habría posicionamiento oficioso a través de posibles editoriales por parte del citado medio.

Una segunda nota a resaltar, y de la que se harían también eco los diferentes medios de comunicación, sería el perfil de político profesional de los delegados del Congreso. Dos de cada tres ocupaban cargos o puestos oficiales⁷⁹¹. Todo un *record* que dejaba muy atrás las anteriores plusmarcas y que ofrecían la imagen de una organización altamente burocratizada y politizada, hasta el punto de que los delegados de base fuera una ínfima minoría con muy escaso peso. De esta forma, escasa sería la presencia de obreros ya fueran cuadros o militantes de base⁷⁹². Y en tercer lugar, a fomentar aquel marco de relativa serenidad vendría la confirmación de la

⁷⁸⁷ Nos remitimos a lo apuntado en la *nota* 508.

⁷⁸⁸ En este sentido es de destacar como en *El Socialista* en los números previos a la celebración del Congreso no aparecía ninguna voz ‘crítica’ de Izquierda Socialista o de otros *compañeros disidentes*. Así tanto en el nº 511 (1990) y el nº 512 de *El Socialista* en la sección titulada «Especial Tribuna 32 Congreso PSOE», predominaría un considerable consenso. Entre otros dirigentes, cuadros y técnicos socialistas allí escribirían: Jordi Solé Tura, Manuel Escudero, Abel Caballero, José Félix Tezanos, Ramón Vargas-Machuca... Por lo demás, nos remitimos a, AHFPI, PSOE-CEF, “Ponencia marco de organización [al] 32 Congreso PSOE: Madrid, 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 917.

⁷⁸⁹ MARAVALL, José M^a, “Cuestiones de principio (1)”, *El País*, 6 de noviembre de 1990; MARAVALL, José M^a, “Las reglas del juego (y 2)”, *El País*, 7 de noviembre de 1990; BENEGAS, José M^a, “El socialismo en la nueva sociedad (1)”, *El País*, 9 de noviembre de 1990. Véase también, por otro lado, el artículo de Ignacio Sotelo quien advertiría acerca del proceso de burocratización y oligarquización a nivel interno, pero también de la ausencia de nuevas ideas y propuestas políticas. SOTELO, Ignacio, “El modelo de partido”, *El País*, 8 de noviembre de 1990.

⁷⁹⁰ Entrevista, “Joaquín Almunia”, *El País*, 9 de noviembre. Se decía allí como el dirigente socialista «ha sido uno de los escasos militantes cualificados del PSOE que se ha prestado a una entrevista en las jornadas previas al congreso». Un dato altamente relevador de ese *silencio político* previo al XXXII Congreso. Una entrevista, por lo demás, en la que se evidenciaría la lucha entre dos concepciones de partido.

⁷⁹¹ Consúltense los datos proporcionados en, “Una organización eficaz”, *El Socialista*, nº 509, (1990), pp. 15-16; y, “El perfil del Delegado”, *El Socialista*, nº 512, (1990), p. 7. En este último caso, se destacaba lo siguiente: «En cuanto a la distribución de los delegados por sectores profesionales, el grupo más numeroso pertenece al área de la docencia, seguido del que se integra en el ámbito de la sanidad. En orden decreciente, figuran los empleados, los administrativos, los funcionarios y los profesionales del derecho [...]. Entre las delegaciones habrá también doce agricultores, doce mineros, once estudiantes, siete arquitectos, cuatro pensionistas, tres amas de casa, dos geólogos, un veterinario, un deportista, un procurador, un físico y un publicista».

⁷⁹² Noticia, “Dos de cada tres delegados al próximo congreso del PSOE tienen un cargo de elección o designación”, *El País*, 6 de noviembre de 1990.

presencia de Nicolás Redondo en el último día, eso sí, invitación para hablar a los delegados asistentes⁷⁹³.

Abierto el Congreso, a nivel externo, en un primer momento, se mostraría un nuevo triunfo a nivel de imagen. Se repetirían las consabidas escenas como había sucedido en otros tantos: aprobación del informe de gestión con cerca del 100%⁷⁹⁴; exaltación de lo realizado sin autocrítica alguna; y veneración al líder del socialismo español⁷⁹⁵. Con razón en la prensa se llegaría a definir dicha situación como “Contentos con ellos mismos”⁷⁹⁶.

Tan entusiasmado y seguro de sí mismo se encontraría el propio Secretario General del PSOE, que no se desaprovecharía su discurso inaugural para dejar para la posterioridad una de sus célebres frases: “También se puede morir de éxito”. No obstante, se advertiría como “[e]ste partido tiene que continuar siendo flexible, tiene que abrir sus filas para representar a la mayoría de la sociedad [...]. Hemos de trabajar por un proyecto que necesita renovarse”⁷⁹⁷.

Reducidas las únicas voces críticas a Izquierda Socialista⁷⁹⁸, también se tomarían un conjunto de decisiones de calado. Al menos dos han de destacarse. La primera y más relevante: poner fin a la afiliación obligatoria a la UGT de los militantes socialistas⁷⁹⁹. Aunque la realidad organizativa evidenciaba como más del 50% de los afiliados socialistas no tenían el carnet ugetista, dicho paso se constituiría en la firme demostración del final de las relaciones Partido-Socialista tal y como hasta entonces se había entendido dentro de la hora desunida familia socialista⁸⁰⁰. Lo que junto con las llamadas a la apertura y/o la renovación y otros signos palpables, constituían, a su vez, el más firme alegato de que el obrerismo socialista era cosa del pasado. No es que tal acontecimiento llegaría a ser una gran novedad en términos políticos, pero sí a nivel simbólico como venimos remarcando⁸⁰¹.

⁷⁹³ Noticia, “Nicolás Redondo asistió a la clausura, pero no habló a los delegados”, *El País*, 12 de noviembre de 1990.

⁷⁹⁴ “Apoyo unánime a la gestión de la Comisión Ejecutiva”, *El Socialista*, nº 513, (1990), p. 2.

⁷⁹⁵ Nos remitimos a la crónica de, Noticia, Anabel Díez y Enric Company, “La gestión de la ejecutiva federal fue aprobada por unanimidad”, *El País*, 10 de noviembre de 1990.

⁷⁹⁶ Noticia, Anabel Díez y Luis R. Aizpeolea, “Contentos con ellos mismos”, *El País*, 9 de diciembre de 1990.

⁷⁹⁷ Noticia, “González cree que hay que renovar el PSOE «para no morir de éxito»”, *El País*, 10 de noviembre de 1990. La interpretación de Guerra tiempo después al respecto de dichas declaraciones presenta un análisis a tener en cuenta: «Se posiciono a favor de incorporar a los liberales al proyecto socialista e hizo una fuerte y clara defensa del mercado como mecanismo de producción capaz de generar prosperidad y bienestar». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., p. 374. Igualmente es de interés detenerse en la inicial lectura que realizaría el propio, GUERRA, Alfonso, “La renovación del proyecto socialista”, *Leviatán*, nº 45, (1991), pp. 51-62.

⁷⁹⁸ Noticia, Enric Campany, “Izquierda Socialista, única fuerza crítica con la intervención del secretario general”, *El País*, 10 de noviembre de 1990.

⁷⁹⁹ Nos remitimos a, “Estatutos Federales”, *El Socialista*, nº 514, (1990), pp. 44-48.

⁸⁰⁰ Como destacaría el propio Charles Powell: «A modo de respuesta, y una vez comprobado que podían ganar unas elecciones sin el concurso de UGT, en el 32º Congreso del PSOE, celebrado en noviembre de 1990, los socialistas pusieron fin a la doble militancia, que había constituido tradicionalmente una de sus señas de identidad como partido ‘obrerista’». POWELL, Charles, *España en democracia...*, op.cit., p. 436.

⁸⁰¹ Noticia, Carmen Parra, “El PSOE eliminará la afiliación obligatoria a UGT, que en la práctica no se cumple”, *El País*, 9 de noviembre de 1990. Allí mismo se informaba también: «Será, según todas las fuentes consultadas, un debate al que se le dedique poco tiempo y pocas energías y que no preocupa en absoluto a la dirección de UGT, porque creen que no va a perjudicar su propia afiliación. La ejecutiva del sindicato tan sólo ha abordado el Congreso del PSOE para decidir qué dirigentes van a asistir y han resuelto que acudirán a la clausura».

El propio Felipe González lo dejó lo suficiente claro a lo largo del citado Congreso como se recogería en *El Socialista*: «Por el contrario, según explicó, esta actitud implica la garantía de poder desarrollar los compromisos adquiridos con los ciudadanos, al margen de presiones de grupos corporativos o hipotecas. ‘Este partido –dijo– ejerce su propia soberanía’»⁸⁰².

Por estas vías ensayadas, el *debate* iba a ser menos explícito a nivel textual y más explícito a nivel de las declaraciones y los discursos allí planteados. Frente a las llamadas al “fomento y organización de la participación ciudadana [...] que contribuyeran a la aparición de un tejido asociativo, rico, ampliado y diverso”; las desmedidas atenciones a la necesidad de acercarse a los movimientos sociales; los correspondientes alegatos para “evitar la dualización de la sociedad” cuya “causa principal [...] es el desempleo”; sin obviar las pertinentes llamadas de atención acerca de la dramática situación de los *jóvenes*; se remarcaría fervientemente la defensa del proyecto autónomo socialista, con muy pocas alusiones a los sindicatos y su papel. Pocas o ninguna, mejor dicho. Pero tampoco faltaría, claro está, el intento de buscar el “diálogo y la búsqueda del más amplio consenso como modo de hacer política”⁸⁰³.

El instrumento para finiquitar el modelo de relaciones Partido-Sindicato sería el de las *resoluciones* allí aprobada antes que por la vía de los documentos marcos, siempre enmendables y, por tanto, discutibles. Se optaría, pues, por el camino más rápido y efectivo. *Resoluciones* de una organización que hacía mucho tiempo que había abandonando por la vía de los hechos consumados la identificación con la clase trabajadora, y que, para evitar, mayores conflictos, omitiría cualquier tipo de referencia que todavía pudiera enervar la crispada situación con los sindicatos de clase.

Así moría “oficialmente” el modelo Partido-Sindicato, a través de un conjunto de *resoluciones*. Pero ni entonces faltaría el intercambio de tibios reproches cuando se leía entrelíneas. El PSOE era, entonces, ya el modelo perfecto del *partido de la modernización* sin referencias programáticas o ideológicas que pudieran confundir a militantes, simpatizantes y demás observadores. Javier Astudillo, por su parte, lo interpretaría de la siguiente forma:

«[S]egún las resoluciones de aquel congreso, ni la utilidad de las organizaciones sindicales estaba asegurada ni, sobre todo, se desprendía de ella una relación exclusiva con la Unión General de Trabajadores. Esta confederación sindical ya no aparecía como ese vehículo privilegiado para llegar a las clases trabajadoras, y socio preferente en un proyecto común, actuando cada uno en su ámbito más propio pero influyéndose mutuamente. Es más, el movimiento sindical, en general, dejó de ser ‘el principal aliado estratégico’, pues las clases trabajadoras perdieron su antigua ‘centralidad’»⁸⁰⁴.

⁸⁰² “Felipe González abogó por un partido abierto, cohesionado y solidario”, *El Socialista*, nº 513, (1990), p. 3. Véase también el resumen del discurso de clausura del propio González en, “El Partido debe seguir trabajando para incrementar su apoyo social”, *El Socialista*, nº 513, (1990), pp. 14-16. Un discurso en donde para el Vicesecretario General se encontraría la clave de todo el Congreso: «En él hizo una proclamación solemne de la autonomía del Gobierno respecto al partido, sin interferencias de este. ‘Se gobierna en Moncloa, no en Ferraz’. A parte del análisis político que ayuda a comprender la oportunidad de tal afirmación, la declaración contenía una clara decisión de ‘independizarse’ del partido de que él era su máximo dirigente. Se transitaba desde la doctrina clásica sostenida por el socialismo español [...] a la teoría de, una vez, elegido presidente del Gobierno, el partido debe olvidarse de su responsabilidad, programa electoral, campaña de argumentos y convencimiento, para renunciar a cualquier orientación de las tareas del Gobierno [...]. El escenario político que se inauguraba poseía un olor cesarista que hacía dudar sobre el futuro de la democracia interna del partido». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, *op.cit.*, pp. 374-375.

⁸⁰³ “Resolución política (1)”, *El Socialista*, nº 514, (1990), pp. 4, 5, 6, respectivamente.

⁸⁰⁴ ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, *op.cit.*, pp. 119-120. Para a continuación afirmar: «El fin de estos consensos y la aparición de un modelo de relaciones partido-sindicato se justifica, sin embargo, por razones distintas en las antiguas organizaciones hermanas. En el caso del Partido socialista en última instancia este nuevo modelo de relaciones venía ligado a la pérdida de la centralidad de los trabajadores en su proyecto, y por tanto, la importancia del ámbito laboral. En el caso del Sindicato

Otra decisión –o si se prefiere “no decisión”– sería la defensa a ultranza de la política económica socialista seguida hasta entonces, imbuida ya del *síndrome* de la competitividad como el nuevo dogma del proyecto del Ejecutivo⁸⁰⁵. Y pese a todo, en paralelo, no faltaría el tradicional *guiño* a los delegados más combativos o politizados. En el documento político se resaltaría como el “Estado debe vigilar para que los beneficios empresariales no aumenten por encima de los niveles de rentabilidad requerido para la continuación y la expansión de las actividades productivas”. Una tesis que encontraría su soporte teórico en la explicación dada por el propio Maravall en esos mismos momentos: “Esta notable convergencia política que vive la izquierda, en buena parte se basa en la aceptación de una *relación contradictoria a la vez que necesaria* entre democracia y mercado”. Para a continuación matizar como las “políticas socialistas defienden la intervención del Estado como garantía de los principios democráticos frente al imperio absoluto del mercado”⁸⁰⁶. Ni rastro quedaría ya de cualquier teorización sobre el socialismo como ideología, como proyecto. Los socialistas por abandonar abandonarían incluso la utópica promesa que realizarían a la salida del XXIX Congreso socialista en 1981, cuando asegurarían como “el socialismo es un proyecto de construcción de las condiciones sociales que hagan posible la felicidad de todos los hombres”⁸⁰⁷.

Sin que pareciera que pudiera haber contradicción aparente o real –a gusto del lector– se aprobaría el Manifiesto del Programa 2000⁸⁰⁸, al que tantos cuidados y mimos les habían dedicado los acérrimos de Guerra⁸⁰⁹. Como advertiría Charles Powell la citada propuesta fundamentó parte de su éxito a nivel interno en frenar el “al supuesto neoliberalismo de algunos ministros económicos”⁸¹⁰. Como le sucedería al *Programa Máximo* –cuyo recuerdo inclusive testimonial se perdería inclusive de los textos congresuales tras la celebración del XXX Congreso de 1984– el Programa 2000 quería, a su manera, como otro *recuerdo patrimonial* en el campo ideológico, al no tener plasmación en el terreno de las decisiones políticas de la nueva ejecutiva entrante.

socialista, por el contrario, se trataba más bien de rechazar la división de tareas y la existencia de ámbitos exclusivos y propios de una organización determinada». Ibídem, p. 128. Consúltense las aclaratorias, AHFPI, PSOE, “Resoluciones [de:] 32 Congreso del PSOE (aprobadas por el 32 Congreso Federal, Madrid, 9-11 de noviembre de 1990)”, Madrid, 1990, sig. Fc 997.

⁸⁰⁵ Noticia, Juan González Ibáñez, “La competitividad económica y la autonomía centran la resolución política”, *El País*, 10 de noviembre de 1990; Noticia, Enric Company, “El congreso respaldó la política económica de Solchaga”, *El País*, 11 de noviembre de 1990.

⁸⁰⁶ MARAVALL, José M^a, “Cuestiones de principio (1)”, *El País*, 6 de noviembre de 1990. Un año antes el principal ‘soporte intelectual’ del socialismo español había abonado el terreno. En un artículo que, en términos generales, ha pasado bastante desapercibido, replantearía teóricamente el nuevo rumbo del socialismo a seguir: MARAVALL, José M^a, “Las razones del reformismo: Democracia y política social”, *Leviatán*, n^o 35, (1989), pp. 27-50. No faltarían, por lo demás, otro tipo de teorizaciones por parte de dirigentes y economistas socialistas por aquellas mismas fechas: RODRÍGUEZ, Julio, “El socialismo democrático ante el reto de la economía abierta”, *Leviatán*, n^o 40, (1990), pp. 15-24.

⁸⁰⁷ AHFPI, PSOE, “Anexo del Acta del 29º Congreso. Política y Estrategia”, Madrid, 1981, sig. Fa 1300, p. 7. Véase aquí también lo apuntado en el Capítulo 4, *nota* 324.

⁸⁰⁸ AHFPI, PSOE, “Ponencia marco del Manifiesto Programa 2000. 32 Congreso, Madrid 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, sig. Fc 921; AHFPI, PSOE, “Memoria de enmiendas ponencia marco del Manifiesto Programa 2000: 32 Congreso, Madrid 9-11 de noviembre de 1990”, Madrid, 1990, Fc 922; y, por último, “Manifiesto Programa 2000”, *El Socialista*, n^o 514, (1990), pp. 7-15.

⁸⁰⁹ La Comisión Redactora estaría formada por: Txiki Benegas, Francisco Fernández Marugán, Salvador Clotas, José Félix Tezanos, Roberto Dorado, Manuel Castells y Manuel Escudero. Véase, aquí, al respecto: ESCUDERO, Manuel, *Pleno empleo*, Madrid, Espasa-Calpe, 1998. Y también: Noticia, “El Programa 2000 fue aprobado con el apoyo crítico de Izquierda Socialista”, *El País*, 11 de noviembre de 1990. Por lo demás, léase el cuadro auto-adulador que presentó en su día, GUERRA, Alfonso, “El Programa 2000” en *Dejando atrás los...*, *op.cit.*, pp. 370-373.

⁸¹⁰ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 512.

Ahora bien, el mismo permanecería para la posterioridad como el último “tibio” intento de propiciar un *giro socialdemócrata* moderado⁸¹¹. *Moderado* en tanto se buscaría una contradictoria simbiosis entre mercado y el socialismo, a través de una lectura nekeynesiana que poco o nada tenía que ver con las raíces históricas del PSOE. Un análisis insuficiente políticamente, en una coyuntura que la *caída* del Muro de Berlín anunciaba el *triunfo universal* de la hegemonía neoliberal⁸¹². De cara a verificar lo anterior, puede resultar notablemente clarificador examinar el apartado de economía y en concreto sus posiciones frente a la creciente flexibilización del mercado de trabajo⁸¹³.

El cronista, antes que periodista, Cándido, supo captar como pocos otros *compañeros* de profesión –e inclusive también como no pocos investigadores y científicos sociales– la “verdadera” naturaleza del socialismo español a principios de los noventa, tras la transmutación ideológica y discursiva de los setenta, y la metamorfosis estratégica de los ochenta. Recordaba así, por ejemplo como el anterior 31º Congreso “más que una asamblea política” se convertiría el mismo en una “una convección empresarial”. El PSOE era “mucho más que un partido, pues sus fronteras se perdían en la sociedad”, advertiría con fundado criterio. Despojado hacía de tiempo de *simbolismos caducos* como de *sentimentalismos*, primaría el “sentido patrimonial del poder” desde entonces. De hecho, dicho Congreso constituiría la “culminación de la paz socialista”, según su propia opinión⁸¹⁴. Todo ello ocurriría cuando todavía había tiempo para la reacción frente a preocupantes fenómenos de deriva burocrática entre los males detectados⁸¹⁵.

Las pruebas a las que se enfrentaría el socialismo en los siguientes casi tres años, y en un marco de no clarificación ideológica como conceptual, acentuarían a marchas forzadas los mencionados problemas. Era cuestión de tiempo que las dos pulsiones mayoritarias dentro del socialismo español, chocarían casi de forma irremediable, más aún con un Ejecutivo volcado en las tareas modernizadoras y europeizadoras. Lejos de interpretaciones personalistas –que si bien pueden servir para el titular correspondiente no explican las bases reales históricas de posibles divergencias– lo que sucedería entre enero de 1988 a noviembre de 1990, tendría más contenido político de lo que comúnmente se ha aceptado. Vaya por delante, que nos hablamos de debates ideológicos a la usanza dentro de la *izquierda*. No. Por la sencilla razón, de que los parámetros en que se moverían los que se (auto)-denominarían, tiempo después, que se conocerían como los *renovadores* –identificados prontamente con el *felipismo*⁸¹⁶– frente a los guerristas, se internaba por caminos que poco tenían que ver con los clásicos debates socialistas o socialdemócratas. Luchas por *el poder* político correspondiente aparte, lo que traslucirían toda una serie de declaraciones o afirmaciones altisonantes –antes que estrictamente debates políticos, insistimos una vez más– eran la suma de una serie de posicionamientos acerca de la necesidad de acentuar o aligerar el carácter más o menos liberal del Partido. Ese era, en realidad, la matriz del debate político.

⁸¹¹ Véase aquí AHFPI, PSOE-CEF, “Ponencia marco [al] 33 Congreso PSOE: Madrid, 19, 29, 20 marzo de 1994”, Madrid, 1994, sig. Fc 1381.

⁸¹² Junto con lo apuntado en la *Presentación* consúltese también el apartado “6.1. Las condiciones objetivas vs subjetivas del trance modernizador”.

⁸¹³ COMISIÓN PROGRAMA 2000, *La economía española...*, *op.cit.*, y en concreto el apartado “4.2. ¿Existe suficiente flexibilidad en el mercado de trabajo” (pp. 111-115).

⁸¹⁴ CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, *op.cit.*, pp. 101, 103, y 104, respectivamente.

⁸¹⁵ Junto con lo apuntado previamente en la *nota 506*, véase asimismo la parte del *Informe Político* del XXXII Congreso destinado a evaluar la situación interna de la organización, en donde apenas se hacía ningún tipo de mención a los problemas detectados previamente, limitándose a ofrecer datos de todo tipo sobre el crecimiento de afiliación del PSOE: “8. La situación del Partido” en PSOE-CEF, “Informe Político (y 2)”, *El Socialista*, nº 510, (1990), pp. 10-14.

⁸¹⁶ Véase en el Capítulo 2, *nota 369* y siguientes.

Por estos mismos caminos, tras el fin del modelo Partido-Sindicato, vendría, a corto plazo, la *ruptura* de la unidad del bloque dominante dentro del PSOE. *Ruptura* que alcanzaría su culmen en el siguiente de los congresos socialistas en marzo de 1994. De esta forma, y frente al poder político y organizativo ostentado por Guerra y sus afines, aparecería cada vez más definido lo que el propio Cándido llamaría el “grupo neoliberal (los renovadores), cuya ventaja era una mayor racionalidad y una capacidad científica mayor para desarrollar los postulados de la izquierda hasta una situación de no izquierda”. Si aquello fue posible, sería porque lo que “realmente estorbaba a Felipe González para rematar su proyecto era el socialismo”. Así tras “abandonar el doble pudor socialdemócrata de hacer convivir dos manantiales, el semisocialista y el semiliberal, fue descubriendo, para desarrollarlo, el principio oculto de la socialdemocracia [...] el principio de que la socialdemocracia no era anticapitalismo”⁸¹⁷. Costó asumirlo pero cada vez aparecía más evidente, más palpable, más cercano.

A pesar del espeso silencio que prevalecería durante las semanas previas al Congreso, todavía resonaban los ecos de la reunión celebrada en el Hotel Chamartín (Madrid) en septiembre de 1990. Reunión de aires conspirativos en donde Joaquín Leguina trataría de ganar terreno –en lo político pero también a nivel de legitimidad frente a la CEF del PSOE⁸¹⁸– de cara a la batalla que mantenía frente a Joaquín Acosta –un hombre afín a Guerra– y que concluiría en un sonado conflicto interno a la par que mediático⁸¹⁹. En el estadillo de tal conflicto, mucho pesaría la presencia de una serie de ministros (Almunia, Solana, Barrionuevo) junto con otros destacados líderes socialistas (Maravall, Alfredo Pérez Rubalcaba, Josep Borrell), apoyando al propio Leguina en su batalla por hacerse por el control del PSM. Allí, por primera vez, se hablaría, primero, del “clan de Chamartín”. Etiqueta política previa a la que pronto le sucedería la de “renovador” y/o “renovadores”⁸²⁰.

Y que mejor oportunidad que hablar de *ideas* y de *renovación* que en un Congreso socialista. Al menos en el terreno de los presupuestos teóricos. Y puestos al caso, también de

⁸¹⁷ CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de...*, *op.cit.*, pp. 147, 156 y 159, respectivamente.

⁸¹⁸ Al respecto el siempre atento observador Ignacio Sotelo hablaría de lo siguiente: «Al fin tenemos un tema importante sobre el que discutir, pero bien pudiera ocurrir que no llegue a levantar el vuelo, ya que obviamente no gusta a los que piden, sin mayor precisión, un ‘debate de ideas’ y cuanto más abstractas mejor. Muy inteligentemente Leguina convirtió un ataque personal en una cuestión de fondo: la tarea más urgente que tiene planteada el partido, hasta el punto de que todas las demás dependen de encontrar a ésta una solución razonable, consiste en superar el actual modelo burocrático de organización». SOTELO, Ignacio, “El modelo de partido”, *El País*, 8 de noviembre de 1990.

⁸¹⁹ Véanse: Noticia, Cristina de la Hoz, “Solana, Barrionuevo y Almunia: El envite de los ministros del «anti-guerrismo»”, *ABC*, 9 de septiembre de 1990; y en concreto, VERGE MESTRE, Tània, *Partidos y representación política: las dimensiones del cambio en los partidos políticos españoles, 1976-2006*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007, p. 51, *nota 9*.

⁸²⁰ Véase, primero, ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*; y asimismo una entrevista suya en *El País* –que ya se ha citado recientemente– y en donde a la pregunta de los porqués de su presencia en la reunión en el Hotel de Chamartín, contestaría: «Es evidente que ha habido compañeros que han entendido que en el partido no cabe el derecho a participar en reuniones que no sean orgánicas. No comparto esa tesis. Siempre que no se rompan las reglas democráticas, ¿por qué no participar en reuniones de este tipo?». Entrevista, “Joaquín Almunia”, *El País*, 9 de noviembre de 1990. Tiempo más tarde declararía: «En el segundo congreso que se celebra en un ambiente de división interna aunque ya menos tensa [...]. Pero a la hora de la verdad, sabiendo, como sabe todo el mundo, que hay ahí divisiones y que los renovadores van ganando espacio y que los guerristas luchan por su supervivencia y por mantener puestos en la Ejecutiva, no hay una sola discusión que permitan contar en términos de posicionamientos políticos sobre algún tema de relevancia hacia el exterior qué piensan los guerristas y qué piensan los no guerristas». Declaraciones a, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo...*, *op.cit.*, p. 333.

apertura del Partido, a la *sociedad*, como había anunciado el mismo Felipe González⁸²¹. Pero la lógica, no es siempre buena conseja en el terreno de la política.

La *fidelidad política* dentro del PSOE constituía otro de esos artículos de *primera necesidad*, que en caso de sospechas o no de adhesión firme, podían conducir a serios riesgos. Así sucedió. Tanto Almunia –entonces Ministro de Administraciones Públicas– como Javier Solana –Ministro de Educación– quedaría excluidos de la composición de la CEF entrante⁸²². Y, por poco, el propio Carlos Solchaga quien renunciaría a formar parte de la lista a la Ejecutiva, aunque entraría en la misma por la federación Navarra⁸²³. No serían los únicos damnificados, pues en medio de turbulencias no previstas inicialmente también les costaría caro –aunque fuera a modo de *rebote*– a los miembros y dirigentes de Izquierda Socialista, a quienes, por primera vez, se les excluiría del Comité Federal⁸²⁴. Pese al extendido *sentir unánime* de aquel Congreso al respecto de abrirse a la sociedad, uno de los mayores interesados, Joaquín Leguina, resumiría así la situación: “Ha triunfado la apertura. Pero, ¿quien gestiona el sí? Los del no”⁸²⁵.

Igualmente el gran perdedor –entrecomílese si se estima oportunamente– sería Carlos Solchaga, según reconocería el *afectado*: “Alfonso Guerra y el *aparato* del partido ha ganado el congreso”⁸²⁶. No se equivocada. Lo que todavía no se podía ni imaginar el propio Solchaga es que Guerra se convertiría en el gran derrotado en la siguiente cita congresual. En cualquier caso, la *derrota* de *Solchaga* iba a ser relativa. La razón: sus tesis económicas no se verían

⁸²¹“Felipe González abogó por un partido abierto, cohesionado y solidario”, *El Socialista*, nº 513, (1990), p. 2; y asimismo consúltase el resumen de las intervenciones de los principales portavoces socialistas por delegaciones: “Apertura y renovación. Los portavoces de 20 delegaciones intervinieron ante el pleno, en el debate de la gestión de la Ejecutiva”, *El Socialista*, nº 513, (1990), pp. 6-7. Siempre prestó a las interpretaciones socorridas Alfonso Guerra daría su versión del asunto en el mismo Congreso, entre saludos y autógrafos: «Yo no creo que González haya hablado de la renovación del PSOE, sino de la renovación de las ideas, de las actitudes; no creo que hablase de renovar el órgano tal o cual, pero si ustedes [al periodista que le pregunta] se lo dijo en privado, sabe más que yo». Noticia, “González habló de renovar las ideas, no el PSOE, según Alfonso Guerra”, *El País*, 11 de noviembre de 1990. Consúltase también: Editorial, “Dos lógicas”, *El País*, 12 de noviembre de 1990.

⁸²² La composición de la Comisión Ejecutiva entrante sería la siguiente: Presidente, Ramón Rubial; Secretario General, Felipe González; Vicesecretario General, Alfonso Guerra; Secretario de Organización, José María Benegas; Secretario de Administración y Finanzas, Guillermo Galeote; Secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores Valencia; Secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, Francisco Fernández Marugán; Secretario de Cultura y Educación, Salvador Clotas i Cierco; Secretario de Política Institucional, Abel Caballero; Secretario de Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Alejandro Cercas Alonso; Secretario de Formación, José Félix Tezanos; Secretaria de Participación de la Mujer, Josefa Parto Ortiz; Secretaria Ejecutiva: Matilde Fernández, Enrique Múgica, Carmen Hermosín, José María Maravall, José Acosta, Antonio García Miralles, José Ángel Fernández Villa, Carmen García Bloise, José María Sala Grisó, Juan Manuel Eguigaray, Raimon Obiols, José Bono, Manuel Chaves, Ramón Aguiló, Florencio Campos, Josefa Frau Ribes, Ludolfo Paramio, Marisol Pérez Domínguez y Jerónimo Saavedra. Datos extraídos de, MARTÍN NAJERA, Aurelio, *Partido Socialista Obrero...*, *op.cit.*, 51. Véase también la lista completa que se presentaría al Comité Federal en, “Nuevos órganos de dirección socialistas”, *El Socialista*, nº 513, (1990), p. 12. Y asimismo: Noticia, “Un total de 11 nuevas incorporaciones al máximo órgano de la dirección socialista”, *El País*, 11 de noviembre 1990; Noticia, “Rechazada la presencia de críticos en los órganos de dirección”, *El País*, 12 de noviembre de 1990.

⁸²³ Noticia, “Los ministros que reclamaron la apertura del partido, excluidos de la dirección del PSOE”, *El País*, 11 de noviembre de 1990.

⁸²⁴ Léase la crónica de, Noticia, Luis R. Aizpeolea, “El congreso socialista ha supuesto una nueva demostración de fuerza del guerrismo”, *El País*, 12 de noviembre de 1990.

⁸²⁵ Noticia, Anabel Díez, “«Los del no» gestionaran «el sí» a la apertura, opina Leguina”, *El País*, 11 de noviembre de 1990.

⁸²⁶ Noticia, “Solchaga: «Alfonso Guerra ha ganado el Congreso»”, *El País*, 12 de noviembre de 1990.

cuestionadas en momento alguno. Ni antes ni después del 32º Congreso. Con o sin, el Manifiesto del Programa 2000. No obstante, en aquella *derrota* mucho pesaría una poderosa razón: “Leyendo las intervenciones de Felipe [González] en ese congreso y conociendo sus movimientos de los días previos, era evidente que no había llegado la hora de dar esa batalla, pues, le exigiría una entrega y un desgaste desmedido costoso”⁸²⁷.

La composición de la nueva CEF del PSOE parecía concluyente a primera vista. Pero, una vez más, las apariencias pueden confundir al lector poco atento. Más aún cuando hablamos de política pero sobre todo de los políticos que lideraron el socialismo español. La configuración de una nueva correlación de fuerzas, en principio, más a fin al *guerrismo*, no tendría su traslación en un potencial giro político del Partido Socialista Obrero Español. Ni antes ni después de la dimisión de Alfonso Guerra como Vicepresidente del Gobierno un 12 de enero de 1991. En realidad, las negociaciones para la composición de la CEF entrante respondían a otras lógicas alejadas de ciertas mayorías o minorías políticas o de posibles alianzas. En suma, lo que allí se discutía y se negociaba era más sencillo, si se observa el asunto con la suficiente distancia: en juego estaba la configuración de una nueva mayoría estable para el control poder político en mayúsculas. Todo ello, lejos de siglas partidistas⁸²⁸.

Concluimos. A pesar de su aparente *fiabilidad* y *consistencia* teórica, los modelos analíticos *lógicos* así como las interpretaciones politológicas o sociológicas basadas en constructos apriorísticos en torno a la conducta racional, nunca podrán captar algo que es consustancial al desarrollo de la Historia. Y cuando hablamos aquí de Historia –leída la misma como una “extraña ciencia”, en palabras del propio Pierre Vilar⁸²⁹– entendemos ésta, en primer término, como un conjunto de interacciones humanas. De hecho, su posible estudio nos obliga a internarnos por un repleto cuadro de subjetividades que nunca podrán captar los anteriores marcos explicativos. Ahí están la influencia de las *sensaciones* –individuales o colectivas– pero también de determinados sentimientos, las ansias personales de poder, las añoranzas e inclusive el dolor o la traición. Elementos humanos que se encuentran, detrás de un sin fin de decisiones

⁸²⁷ PALOMARES, Alfonso, *Felipe González...*, op.cit., p. 363.

⁸²⁸ Resulta aquí, de nuevo, interesante leer con atención el testimonio de Guerra de cómo se configuró dicha Ejecutiva: «Felipe González me pidió que nos quedáramos solos [para hablar] de la formación de la dirección del partido [...]. Sacó un folio con una lista completa de la Ejecutiva escrita a mano por él mismo, se reconocía su letra. Y comenzó a leer los nombres. Al llegar a Javier Solana hice un tímido comentario acerca de la desautorización que suponía para el vicesecretario del partido, dado que había estado en la gestación de la reunión de Chamartín. No me dio tiempo a terminar. Tomó su pluma estilográfica y tachó el nombre de Solana, sin un argumento, sin la menor defensa. En aquel momento lo interpreté como una muestra de su enfado o molestia porque todos repetían que el partido estaba en manos de los dirigentes de Ferraz, que el presidente del Gobierno había delegado la dirección del partido en el equipo que era identificado como guerrista. Pensé que era una expresión de incomodidad por el ambiente general que se había creado sobre su autoridad más formal que real en la organización, a lo que se debía añadir el calentamiento de cabeza al que le sometían algunos dirigentes ‘renovadores’ sobre todo los que eran ministros. Más tarde, teniendo a la vista el discurso de clausura del Congreso, la reacción de algunos liberales, especialmente Solchaga, y la visión del periódico intérprete principal del grupo que intentó el asalto a la dirección, he pensado muchas veces si no estaba todo algo más preparado de lo que yo había sido capaz de percibir. No pienso en una conspiración, no; es algo más sutil: unos observan cómo actúan otros, acompañan sus palabras a la estrategia que creen vislumbrar; los demás van conformando sus posiciones a una estrategia tácita que va adquiriendo forma sin una previa coordinación, pero el planteamiento va haciéndose común, único, convergente al paso de los acontecimientos». Para concluir: «El resultado de aquel Congreso [fue que] el partido salió dividido. Se forma una Ejecutiva que contaba con la autoridad que le daban los militantes a través de los delegados; pero un grupo del Gobierno y el partido no aceptó de buen grado la legitimidad de la dirección, salvo al secretario general, y no dejaron de actuar en consecuencia desde el mismo día en que finalizó el Congreso». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., pp. 376-377.

⁸²⁹ VILAR, Pierre, *Historia marxista...*, op.cit., p. 9.

de enorme calado en el devenir histórico. *Subjetividades* que, a su vez, se han de enmarcar dentro de estructuras, supraestructuras... como tiempo habrá de explicar⁸³⁰.

Por más que el antes, el durante y el después del 14-D se haya querido leer e interpretar en términos personales o inclusive a través de explicaciones de tipo psicológico freudiano, dichas lecturas se encuentran apoyadas en pobres razones y todavía más en paupérrimos argumentos. La *historia* como la *política* siempre resultan más intrincadas. Especialmente teniendo en cuenta que por su propia *naturaleza* el Homo Sapiens Sapiens tiende a la complejidad lógica y no lógica.

Probablemente no se dirá nada nuevo tampoco, si afirmamos que cuando nos internamos en la búsqueda de las claves del acontecer histórico, se ha de realizar un análisis multidimensional que trate de tener presente la mayor cantidad de elementos explicativos. Ni el *individualismo metodológico* ni los modelos teóricos apriorísticos son buenos acompañantes en tales empresas. Quienes así abordan el estudio del pasado –reciente o no– no podrán llegar a comprender, por ejemplo, la *fuerza de la solidaridad* como motor de las movilizaciones promovidas por el movimiento sindical, tanto bajo el franquismo como en tiempos socialistas. Ahí está también la fuerza de la *solidaridad de clase* que explicaría, a nuestro juicio, buena parte del éxito del 14-D. Como tampoco llegarán a comprender quienes se apoyan en tales preceptos, que fuera de las lógicas aparentes y de los consabidos juegos de intereses, la cerrada confianza –o inclusive la *fe política* a modo de “religión política”– en una determinada política económica, puede llegar a resultar un factor explicativo determinante a la hora de asentar una explicación consistente y coherente en términos históricos, más allá de lo que indican los datos macroeconómicos.

La historia la hacen las mujeres y hombres, quienes desde sus diferentes niveles de responsabilidad tuvieron que tomar respuestas de enorme calado a múltiples problemáticas de su tiempo. Una historia en donde el factor humano así como el identitario y el simbólico juegan un papel central. Tal forma de interpretar lo histórico es sólo accesible desde una *historia social desde abajo y con los de abajo*, por más que a quien pueda llegar a examinar, desde la óptica del historiador, resulte el dirigente sindical, el Presidente del Gobierno o un destacado militante socialista. Por estas mismas razones expuestas, el fijarse en esos pequeños detalles que suelen omitirse en los grandes relatos, puede llegar a resultar tanto o más aclaratorio que las propias dinámicas intrínsecas de toda una época.

Llegados aquí, puede parecer insignificante un hecho menor que ocurría durante el citado Congreso socialista. Sí de esos que apenas se recuerdan a *posteriori*. Que Felipe González comentara a los periodistas al final del 32º Congreso del PSOE que no recordaba la letra de *La Internacional*, constituye, a fin de cuentas, uno de esos pequeños detalles del escrutinio de lo histórico sin los que, a buen seguro, nunca se podrá llegar a comprender plenamente la naturaleza que caracterizó la economía política del socialismo español⁸³¹.

«Arriba los pobres del mundo.
En pie los esclavos sin pan
Alcémonos todos al grito
¡Viva la Internacional!».

⁸³⁰ En concreto nos remitimos al apartado “8.4. Un posible balance en torno a la época socialista alejado de los *lugares comunes*”.

⁸³¹ Noticia, “González no recuerda «La Internacional»”, *El País*, 12 de noviembre de 1990.

8. El precio de la modernización. «Principios de realidad» esenciales: los resultados macroeconómicos

«Se trataba de cuestiones complejas que exigieron, por una parte, un análisis económico sólido, y por otra, la voluntad colectiva de resolver nuestros problemas. Afortunadamente, ambos ingredientes se combinaron con sabiduría, tenacidad, flexibilidad y rigor. El resultado fue el progresivo restablecimiento de los equilibrios básicos de nuestra economía, pórtico de una transformación sin precedentes que nos ha conducido a ocupar puestos de liderazgo en la economía mundial».

Rafael del PINO, Empresario español y uno de los hombres más ricos del mundo¹.

«El conjunto de tales proyectos se expresó siempre a través del rótulo de promover la verdadera ‘modernización’ del país. Pero el gran hecho fue que, una vez en el gobierno, el radicalismo verbal anterior con el que se expresaban estos objetivos de cambio se atemperó de forma muy notable y se impuso la realidad desnuda de las consecuencias de las transacciones que había traído la transición. La utopía reformista hubo de llevarse cabo con mucho menor ritmo y mucha menos profundidad».

Julio ARÓSTEGUI, *La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)*².

Los gobiernos socialistas y sus principales dirigentes adquirieron con el paso del tiempo, la casi imperturbable *costumbre* de presentar los resultados de su política económica en formato empresarial. Es decir, a modo de gestión de balance de cuentas y resultados. Por y a través de un renacido lenguaje político-tecnocrático, en donde los datos macroeconómicos lo justificaban todo, se iría configurando un nuevo modelo productivo fruto de la estrategia de la modernización emprendida en 1982.

Difícilmente se puede avanzar en una presentación si no *objetiva*, al menos, lo más *cercana* a la realidad histórica, si antes no se parte de una previa inversión de las lecturas dominantes que han rodeado a este tiempo y este espacio³. Lecturas que han basculado, en lo básico, en torno a dos ejes interpretativos: el *liberal-conservador* y el *liberal-progresista*, incluyéndose en esta última “sección” lo que hemos denominado como los relatos *amables* y/*condescendientes*.

Tanto a nivel historiográfico como concretamente en lo que se refiere a las ciencias económicas, este periodo histórico ha tendido a ser catalogado simple y llanamente como un “éxito” –e inclusive de *milagro*– en lo económico. Dicho esto, es cierto ¿qué se produjo el tan anhelado “salto adelante”? En buena medida, se trata de una tesis con arraigo dentro de los lugares comunes en torno a este tiempo histórico.

Nos encontramos aquí ante una batalla soterrada a la hora de realizar una lectura global sobre tal época histórica. La razón, de nuevo, es sencilla cuando no evidente: en juego está la constatación de las “virtudes” de la política liberal pero también de sus “costes”, y lo que no es

¹ PINO, Rafael del, “Presentación” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, *op.cit.*, p. 8. Sobre este ‘ilustre’ personaje’, CABRERA, Mercedes, “Rafael del Pino Moreno (1920)” en TORRES VILLANUEVA, Eugenio (dir.), *Los 100 empresarios españoles del siglo XX*, Madrid, LID, 2000, pp. 482-487.

² ARÓSTEGUI, Julio, “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España...*, *op.cit.*, p. 315.

³ Nos remitimos aquí tanto a lo apuntado en la *Presentación* como a lo largo del apartado “2.2. Un estado de la cuestión de circunstancias”.

menos importante, los resultados finales de los dilemas o *trade-off* a los que se enfrentaron los ejecutivos socialistas.

Igualmente sería de una enorme “inocencia académica” pretender interpretar la estrategia de la modernización con la simple observación de datos y más datos, o, directamente, a través del empleo de adjetivos más o menos grandilocuentes. Resulta obligatorio dotarse de un contra-modelo o por lo menos de unas orientaciones “críticas”, que vayan más allá de cómo un “gobierno intenta gestionar el ciclo económico”⁴. Pues si bien un gobierno puede gestionar –no sin dificultades– un ciclo determinado, otra cuestión radicalmente diferente es que pueda llegar a *gobernar* una economía de mercado cada vez más internacionalizada. No se pretende aquí ensayar modelo analítico novedoso ninguno ni realizar elaborados cálculos estadísticos con sucesivas disgregaciones, cálculos econométricos o internarse por las últimas tendencias estadísticas. Es más sencillo y complejo a la vez.

Partiendo de las bases teóricas y metodológicas apuntadas en la *Presentación* y en buena parte del *Capítulo 2*, junto con el estado de la cuestión presentado *ad hoc*, se trata de ir un paso más allá⁵. De entrada, se requiere operar lejos –o mejor dicho radicalmente enfrentados– de una lectura que vincula directamente la acción de un determinado gobierno y sus respectivas políticas económicas, con la concreción de unos resultados macroeconómicos. Por este camino, la fotografía que obtendremos, por más que se intercalen datos y más datos, sería parcial e incompleta.

De sobresaliente interés son las tesis actualizadas procedentes del materialismo histórico de Diego Guerrero citadas en parte, y que ahora se nos redescubren especialmente oportunas para estas líneas. “Las relaciones entre lo económico y lo político se observan con un alto grado de idealismo”, señalaría en su día el citado economista para a continuación añadir como,

«si se profundiza en el análisis de la evolución global de la sociedad, enseguida aparecen grandes tendencias generales, que parecen responder a la existencia de ciertas ‘leyes’ sociales, y se perciben pautas regulares de funcionamiento del *sistema*, que operan normalmente de forma subyacente, sin manifestarse de forma completamente evidente en la epidermis social»⁶.

Y aquí se encuentra una de las claves que nos son de interés. Nos referimos a lo que sigue a continuación. La permanencia –tal y como se ha insistido repetidamente– de una “centralidad” que ha estado presente en la historia contemporánea en los países occidentales. Es decir, la continuidad en el tiempo de un mismo modelo económico, el capitalismo, más allá de los respectivos regímenes políticos que han ido sucediéndose. Esta misma centralidad es un “mecanismo con tal fuerza impulsora que es capaz de moldear, condicionar e inclusive determinar, los aspectos no económicos de nuestra evolución social”⁷.

Si esto es así, y estamos convencidos de que es así y no de otro modo, todo posible análisis gira en torno a otras preguntas que van más allá del crecimiento del PIB, del déficit público o del escrutinio de otras tantas variables. En este preciso lugar aparece una segunda e importante clave: el estudio de los mecanismos y de la lógica del crecimiento del capital. Una lógica que guiada por la “maximización del beneficio”, conlleva una causa-efecto que es la que trataremos de ir analizando y explicando: la tesis del incremento de las tasas de explotación capital-trabajo durante la época socialista.

Toca, por tanto, examinar, en primera instancia, las “leyes” objetivas que están tras este modelo económico a partir de otra hipótesis primordial: “La explotación es un resultado normal

⁴ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 23.

⁵ Véase junto con la *Presentación*, el apartado “2.1. Nuestros caminos de aproximación: interrogantes e hipótesis de trabajo”.

⁶ GUERRERO, Diego, *La explotación...*, *op.cit.*, p. 49.

⁷ *Ibíd.*, p. 50.

e inevitable de la *acumulación de capital*, es decir, del hecho de que la economía del país adopte, bajo un revestimiento político dispar, el mismo régimen económico dominado por el capital y el beneficio” concluye, una vez más, el propio Guerrero⁸.

En esta inversión de prioridades analíticas lo substancial no es releer, de forma exclusiva, los resultados macroeconómicos de la “década del cambio”. Tarea, en todo caso, imprescindible para avanzar en este marco teórico y metodológico. El siguiente paso que daremos se vincula con algo que ya se ha dejado apuntado: la configuración de un nuevo modelo productivo. O directamente, *cómo y por qué cambian los modos de producción*⁹. A saber, nos interrogamos por el propio *motor de la historia* del que hablara en su día el mismo Marx. De lo que puede deducirse, en conjunto, como más allá de las orientaciones, márgenes de actuación y otras cuestiones menores en lo referente a la política económica de los gobiernos socialistas, su papel en la modificación de las grandes variables de la economía del país debe relativizarse, de entrada, en el cómputo final.

No obstante, su apuesta por una determinada y única política económica, tendrá notables consecuencias en la consolidación de la segunda fase de la reestructuración del capitalismo español contemporáneo. Pues se trató en lo básico de eso, de reforzar desde un régimen político las líneas predominantes de un régimen económico. Otra cuestión sería la retórica y dialéctica socialista que hablaría de cómo tal política no era fin en sí mismo, sino que formaba parte de una gran estrategia con el objetivo final –no saliéndonos evidentemente de lo teórico en buena medida– de asegurar una redistribución social del crecimiento económico a medio y/o largo plazo. O expresado en otras palabras: la política económica tendría un *sentido instrumental* para el socialismo español.

Sentadas estas fundamentales hipótesis de trabajo, nuestra tesis a demostrar tampoco se recude a catalogar la dirección de una política simplemente. Estamos ante algo más complejo. Nos internaremos por las causas y motivos que convirtieron en la práctica –siempre desde una perspectiva histórica– a los ejecutivos socialistas en el necesario *sujeto político* para asegurar una salida a la crisis económica favorable a los intereses del capital; segundo, como actuó ese mismo *sujeto histórico* de cara a reestructurar el modelo capitalista español en línea con las tendencias hegemónicas dentro del liberalismo del último cuarto del siglo XX; y, tercero, como dicho *sujeto sociohistórico* desarrolló toda una serie de estrategias macropolíticas con el fin de garantizar, en suma, una nueva hegemonía política, social e inclusive cultural del régimen económico de mercado. Una legitimidad cuestionada fuertemente durante buena parte de la época socialista, tanto por la profundidad de la crisis económica como por la palpable debilidad del régimen político-económico de entonces¹⁰. Precisamente, por esto senderos delineados, llegamos a uno de los grandes cambios históricos que se operarán en estos años: la superación de esta patente *debilidad* del régimen de dominación económica-política.

Planteado tal marco teórico se seguirá el siguiente esquema de análisis. En primer término, se irán desgranando las principales variables macroeconómicas sobre las que Gobierno/Partido y economistas afines, han basado su lectura del *éxito* o el *gran salto adelante*. En un segundo lugar, se incorporarán otros indicadores y variables, tanto desde una perspectiva macro como microeconómica de cara a constatar la tesis aquí avanzada: el crecimiento de las tasas de la explotación capital/trabajo hasta cuotas no conocidas en la historia contemporánea reciente. Y en tercer lugar, se plantearán una serie de valoraciones acerca de los *otros costes y resultados* sobre los que no se mencionan habitualmente aspecto alguno en los manuales e interpretaciones al uso.

⁸ Ibídem, p. 60

⁹ FRANCISCO, Andrés de, “A modo de prólogo: de la centralidad del trabajo a la teoría de la Historia en Marx”, en HERRERO VÁZQUEZ, Francisco, *Hacia una reconstrucción...*, op.cit.. Véase, una vez, lo apuntado a nivel teórico-histórico en la *Presentación*.

¹⁰ En este caso nos remitimos, en conjunto, al Epígrafe “IV. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”.

En dicha tarea, disponemos de numerosas bases estadísticas públicas y privadas, tras una infinidad de revisiones y reactualizaciones metodológicas¹¹. Pese a lo anterior, ha de advertirse una serie de notas cuando este tipo de estadísticas se emplean de cara a una investigación académica y en un epígrafe de la naturaleza como el que vamos a desarrollar a continuación.

Concretamos. La mayor parte de las estadísticas –por no decir prácticamente todas– tienen más allá de su propósito nominal un objetivo político-socioeconómico en función de su “patrocinador”¹². En primer lugar, responden, por obvio que siempre resulte señalarlo, al examen de una economía de mercado, de modo que en su planificación y elaboración ya se realiza una tarea previa de discriminación funcional a la hora de seleccionar determinados valores en detrimento de otros. En segundo término, tras todo el aparato científico-técnico que se esconde tras las estadísticas, tanto públicas como privadas, existe una intención normativa en función del régimen económico dominante. Lo vimos sobradamente cuando examinamos la “fiabilidad” de las estadísticas salariales –en concreto los cambios metodológicos sobre la EPA¹³–. Una cuestión, en tercer lugar, que queda ampliamente demostrada en el momento –sin salirnos del ámbito del Estado, de lo público en este caso– en que las administraciones públicas modifican los sistemas metodológicos de medición en función de determinados intereses políticos, partidarios, en no pocas ocasiones.

Realizadas estas advertencias y limitaciones que condicionan de entrada un estudio de lo histórico, en este apartado, que tampoco se pretende exhaustivo a modo de un posible análisis exclusivamente económico, se emplearán las siguientes bases de datos: a) las procedentes de la Contabilidad Nacional que proporciona el INE principalmente; b) la base de datos de los servicios técnicos del Banco de España; c) y, el banco de datos generado por la siempre competente la Fundación BBVA en esta materia. Las tres anteriores son, a buen seguro, tres de las más contrastadas. Por su parte, para los datos europeos e internacionales, cuando no se indique lo contrario, se utilizarán la base de datos de Eurostat y de la OCDE.

En las siguientes páginas se presentan una serie de tablas y gráficos en un nivel de disgregación prácticamente nulo. Si hasta el ahora se han ido esbozando un conjunto de datos “suelos” por etapas, ahora se tiene por objeto “fotografiar” un periodo cerrado que tiene una coherencia analítica lo suficientemente consistente para ser historiado como tal.

8.1. ¿El gran salto adelante?

«[El socialismo] arbitró aquella célebre engaños de que la política económica era lo instrumental y la política social lo finalístico. En ella, bajo la máscara de una falaz ordenación causal, que permite llamar instrumental a lo que viene antes y finalístico a lo que viene después se camuflaba la aviesa realidad del orden de toda economía capitalista, en la que por definición, el interés del capital es prioritario respecto al del trabajo. La verdadera finalidad en la economía capitalista sigue siendo la de satisfacer el furor y el beneficio».

Rafael Sánchez-Ferlosio, *Las maniobras de Felipe*¹⁴

¹¹ Sobre todas estas cuestiones nos remitimos al apartado “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

¹² Consúltese lo apuntado en las conclusiones tanto de este Capítulo como de todo el III Epígrafe, en el apartado “8.4. Un posible balance en torno a la época socialista alejado de los *lugares comunes*”.

¹³ Véase la *nota 11*.

¹⁴ SÁNCHEZ-FERLOSIO, Rafael, “Las maniobras de Felipe”, *Cambio 16*, 25 de diciembre de 1984.

El primer indicador para acercarnos a este periodo es la evolución del propio PIB en su nivel más básico, para progresivamente, paso por paso, ir disgregando su comportamiento en diferentes aspectos. Ahora bien, antes de avanzar se ha de tener presente que el PIB sólo representa exclusivamente la economía formal¹⁵. Aspecto relevante en un país como España con grandes bolsas de economía en *negro*¹⁶.

No es éste un asunto menor, pues durante los gobiernos socialistas este sector económico crecería notablemente. He aquí una primera gran realidad histórico-estadística de este tiempo. Para un cálculo aproximativo de su *peso* en relación con el valor total del PIB entre los diversos estudios publicados, dos son lo suficientemente elocuentes. El primero, el de Ángel Alañón y Miguel Gómez –*Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas*–. Autores quienes plantearon en su día un método de análisis a tener en cuenta¹⁷. La metodología que emplearon se basó principalmente en calcular el pago en efectivo en negro por cuestiones fiscales derivadas de una actividad económica, y que lógicamente no aparece en contabilidad oficial del país. De este modo, tras tener presente un conjunto de estimaciones estadísticas sobre la demanda de efectivo, tanto en la economía “legal” como “ilegal”, ofrecieron los datos que se aportan en la *Tabla 2*, y que, concisamente, presenta uno de los posibles indicadores para medir el porcentaje de la economía sumergida en relación al VAB a precios constantes. Por otro lado, Jordi Sarda e Ignacio Mauleón –*Estimación cuantitativa de la economía sumergida en España*– utilizaron otro modelo de cálculo económico avanzado para acercarse no sólo al porcentaje total de la economía sumergida, sino a su posible cuantificación monetaria en miles de millones de pesetas¹⁸.

Si bien, y como es evidente se tratan de estimaciones a partir de una *realidad económica* difícilmente calculable –o mejor dicho, precisable– en ambos estudios sobresale el incremento de la economía sumergida en la “década del cambio”. Una evolución oscilante que, en ningún

¹⁵ Sobre la composición y funcionalidad del PIB ténganse presentes los siguientes ‘manuales’ básicos de macroeconomía: ARGANDOÑA RAMÍZ, Antonio, GÁMEZ AMIAN, Consuelo y MOCHÓN MORCILLO, Francisco, *Macroeconomía avanzada*, II vols., Madrid, McGraw-Hill, 1997-1999; o, BIRCH SØRENSEN y JØRGEN WHITTA-JACOBSEN, Hans, *Introducción a la macroeconomía avanzada*, II vols. Madrid, McGraw-Hill, 2008. Y desde una perspectiva radicalmente diferente: GUERRERO, Diego (ed.), *Macroeconomía y crisis mundial*, Madrid, Trotta, 2000; y, TORRES LÓPEZ, Juan, *Economía Política*, 3ª ed., Madrid, Pirámide, 2003. Por lo demás, véase lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 149*.

¹⁶ Consúltense la bibliografía y las anotaciones correspondientes ya citadas en el Capítulo 2, *nota 148* y otras, en el Capítulo 6, *nota 258* y otras.

¹⁷ ALANÓN, Ángel y GÓMEZ, Miguel, “Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas”, *Papeles de Trabajo de Institutos de Estudios Fiscales*, nº 3, (2003). Y en relación a los estudios teóricos sobre la *economía sumergida*, los más relevantes proceden del mundo anglosajón. Entre otros muchos: FEIGE, Edgar L., “How big is the irregular economy?”, *Challenge*, nº 22, (1979), pp. 5-13; y del mismo autor la coordinación de la obra colectiva, id. (ed.), *The underground economies. Tax evasion and information distortion*, Cambridge, University of Cambridge, 1989; BARTHELEMY, Philippe, “The macroeconomic estimates of the hidden economy: a critical analysis”, *Review of Income and Wealth*, vol. XXXIV, nº 2, (1988), pp. 183-208; SCHNEIDER, Friedrich, “Empirical Results for the Size of the Shadow Economy of Western European Countries over Time”, *Discussion Paper. Institut für Volkswirtschaftslehre, Linz University*, nº 9710, (1997); FLEMING, Matthew H., ROMAN, John y FARRELL, Graham, “The Shadow Economy”, *Journal of International Affairs*, vol. LIII, nº 2, (2000), pp. 387-409.

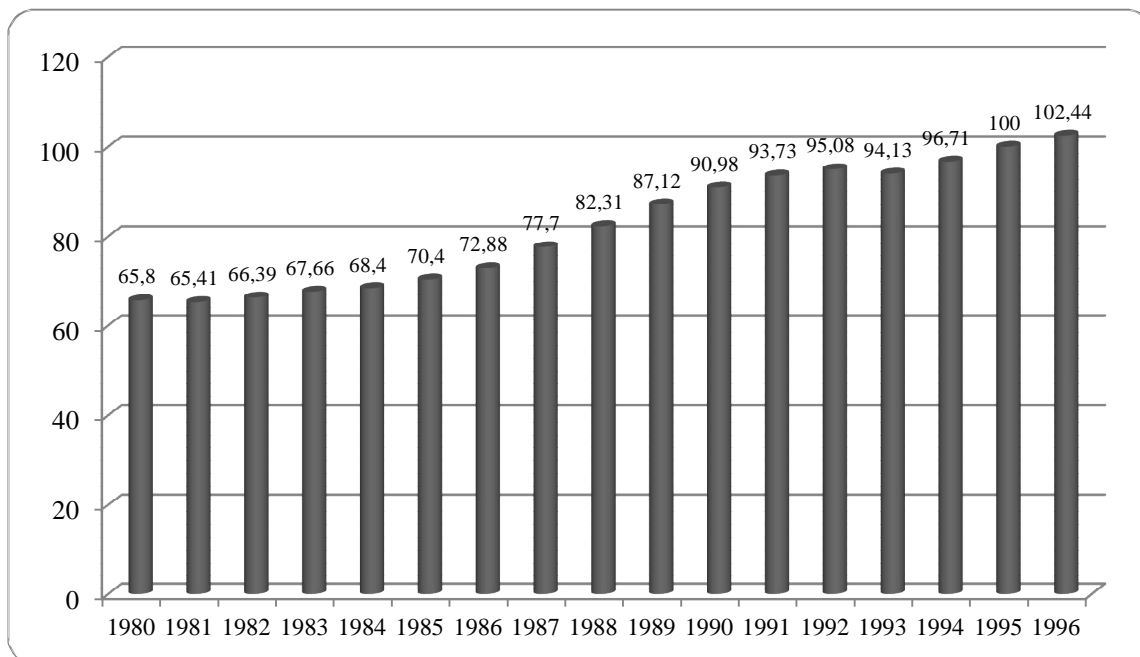
¹⁸ SARDA, Jordi y MAULEÓN, Ignacio, “Estimación cuantitativa de la economía sumergida en España”, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 39, (1997), pp. 124-135. Véanse aquí otras relevante aportaciones en esta misma línea de trabajo en: ARGIMON, Isabel, “Técnicas de medición de la evasión fiscal”, *De Economía Pública*, nº 5, (1989), pp. 43-58; ALBI IBÁÑEZ, Emilio, “Elusión y evasión fiscales”, *Hacienda Pública Española*, nº 2, (1992), pp. 251-263; ESCOBEDO, Mª Isabel y MAULEÓN, Ignacio, “Demanda de dinero y economía sumergida”, *Hacienda Pública Española*, nº 119, (1991), pp. 105-122; o, TRIGO PORTELA, Joaquín, *Vieja y nueva economía irregular*, Madrid, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 2001.

caso, bajaría de tasas del 15% sobre el total del PIB llegando a picos cercanos al 20%. Una realidad que forma parte no sólo de la economía española sino de buena parte de los países que conforman la Europa del Sur¹⁹ [consúltense en el “anexo” la *Tabla 2* y la *Tabla 3*].

Retomando nuestro principal objeto de examen, y de cara a evitar la tentación de explorar exclusivamente los datos como realidades estadísticas que todo lo dicen, lo pueden y lo justifican, ha de partirse de los niveles económicos generales extremadamente bajos a raíz de la etapa depresiva de los setenta. Esto resulta esencial para interpretar los resultados del proyecto económico del Gobierno, pues durante cerca más de un lustro la economía española tendría tasas negativas y claramente inferiores a la de sus países de entorno. Precisamente el peso de las tantas veces citada “herencia recibida”.

Las dos siguientes *tablas* junto con el *Gráfico* que las acompaña vienen a representar las principales características del PIB en estos años. Sin mayores dificultades pueden realizarse las siguientes anotaciones: primero, las sucesión e interrelación de las tres fases por la que se atraviesa durante esta década; segundo, el crecimiento continuado del PIB tan sólo interrumpido negativamente durante los años más duro de la crisis de los noventa (1993 y 1994); y en tercer término, y en relación con lo anterior, el progresivo proceso de enriquecimiento económico global del PIB que pasará de un PIB_{pm} de 47.930.732 de pesetas en 1980 a 69.569.407 de pesetas en 1992 [consúltense en el “anexo” la *Tabla 4* y la *Tabla 5*].

Gráfico 1. Evolución del PIB a precios constantes, 1980-1996 (millones de pesetas de 1995)

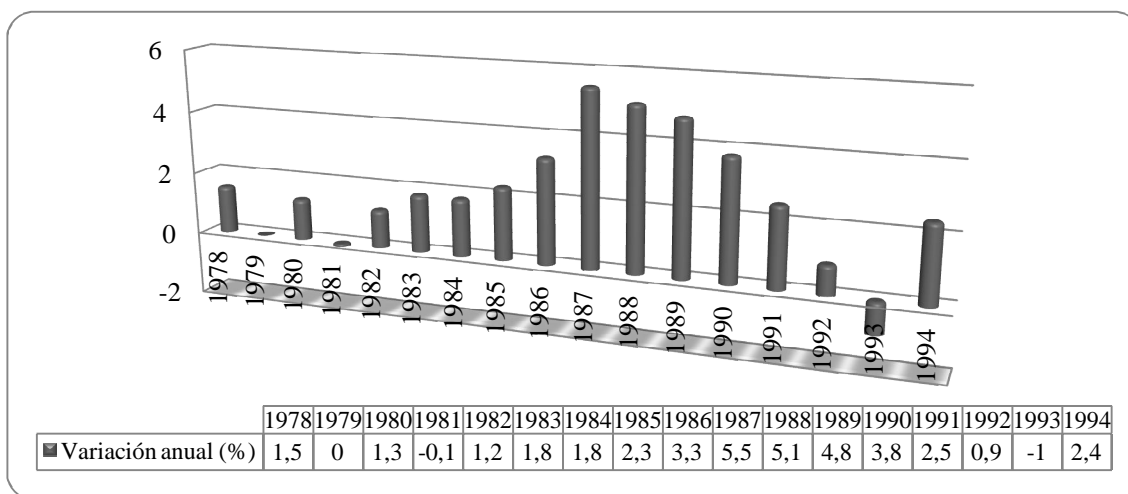


¹⁹ En primer término consúltense: PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ZAMAGNI, Vera (eds.), *El desarrollo económico en la Europa del Sur: España e Italia en perspectiva histórica*, Madrid, Alianza, 1992; DELL'ANNO, Roberto, GÓMEZ, Miguel y ALAÑO, Ángel, “The shadow economy in three Mediterranean countries: France, Spain and Greece”, *Empirical Economics*, vol. XXXIII, nº 1, (2007), pp. 111-130; y el ya citado trabajo de, ÁLVAREZ MIRANDA, Berta, *El sur de..., op.cit.*. En todo caso mucho más ilustrativo para entender las dimensiones y facetas de la economía sumergida resulta el conocido libro de, SAVIANO, Roberto, *Gomorra: un viaje al imperio económico y al sueño del poder de la Camorra*, Barcelona, Debate, 2007. Y, también a otro nivel, ahora académico, BENERÍA, Lourdes, “El debate inconcluso sobre el trabajo no remunerado”, *Revista Internacional del Trabajo*, nº 3, (1999), pp. 321-346.

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.6 y elaboración propia.

Lo cierto es que en *bruto*, y sin un marco de comparación posible, estos datos dicen poco o nada. A lo sumo se puede constatar el sostenido cuando no rápido crecimiento del PIB durante la segunda parte de la *década del cambio*. Porque más allá de hablar “progreso”, “despegue” o “normalización” de la economía del país –términos tan habituales en medios socialistas²⁰ y con claras connotaciones político-ideológicas²¹– y sin negar la mayor –la constatación de un crecimiento económico– cabe preguntarse si realmente los datos del PIB son de tal dimensión para así calificarlos. Resulta que si, en un primer nivel, procedemos a examinar la tasa de variación anual del PIB desde el año de la Constitución –por partir de los peores años de la crisis– hasta tres lustros después no pocas afirmaciones deberían revisarse.

Gráfico 2. Evolución de la tasa de variación anual del PIB real, 1978-1996



Fuente: INE (CNE-70) y elaboración propia.

A partir de tales datos proporcionados podemos calcular la tasa media para los siguientes intervalos de tiempo: 1,2% entre 1978 a 1985, 3,7% entre 1986 a 1992 y 0,7% entre 1993 a 1994²². De modo que, el “milagro económico socialista” quedaría reducido, a lo sumo, a apenas seis años. Un primer punto a valorar, oportunamente, pues coincide el final del ajuste más duro junto con el cambio de ciclo económico en las economías occidentales, y sobre todo se encuentra interconectado con la exponencial elevación de la demanda interna que crecería anualmente durante buena parte de este periodo por encima del PIB. Un rasgo característico de la economía española –véase en el “anexo” la *Tabla 6*– que determinaría con fuerza la misma evolución de la inflación así como de la balanza de pagos.

Una cuestión que todavía queda más clara cuando se analiza la transformación de la composición de la demanda agregada, en donde el peso del consumo privado constituye uno de los principales motores del PIB –consúltase en el “anexo” la *Tabla 7*–. De hecho, si se procede a desglosar las partidas del consumo privado nacional –a partir de los datos ofrecidos por la

²⁰ FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 171.

²¹ IBARRA, Pedro, IDOYAGA, José Vicente y ZALLO, Ramón, “Ideologías y medios de comunicación en los 80” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 733.

²² Datos procedentes de, GUERRERO, Diego, *La explotación...*, op.cit.; y, id. “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delinquentes políticos...*, op.cit..

Encuesta de Presupuestos Familiares y la *Encuesta Continuada de Presupuestos Familiares*²³ – se obtienen una serie de medidores fiables acerca del peso que adquiere la adquisición de la vivienda, y otros bienes de consumo duradero, relacionados tanto con el crecimiento económico como con el cambio de las pautas culturales de consumo²⁴ [consúltense en el “anexo” la *Tabla 8* y la *Tabla 9*].

Ciertamente en aquellos años se recuperó, en términos del crecimiento del PIB, buena parte del diferencial con respecto a la CEE, creciéndose durante la segunda mitad de los años ochenta por encima de la media europea casi un punto en total²⁵. Unos datos que serían aprovechados en plena ola expansiva por parte del Gobierno para legitimar, en la medida de lo posible, su proyecto modernizador cuando se crecía a tasas superiores a los dos puntos de media anuales²⁶.

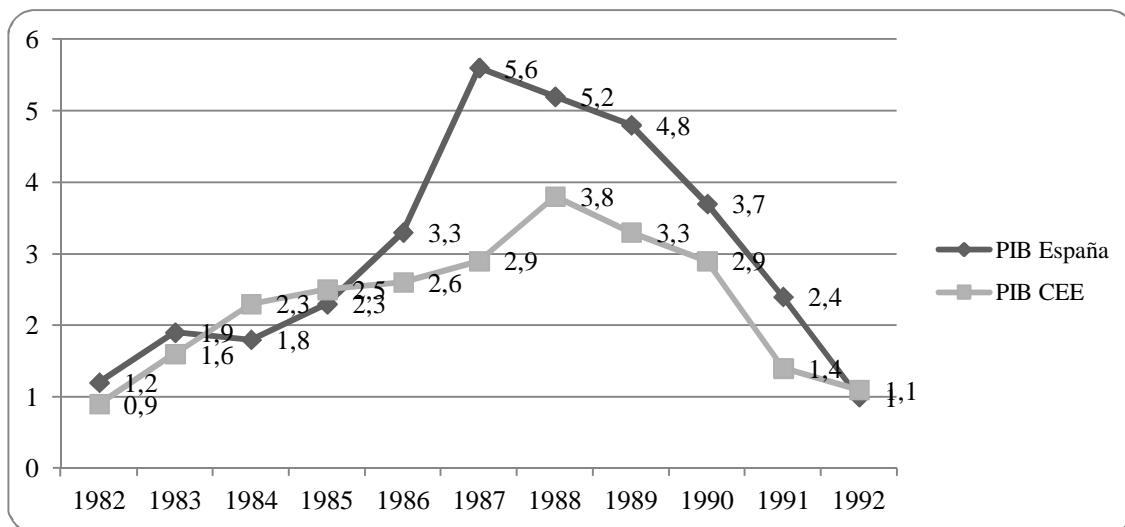
²³ Primero, véase, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Encuesta de Presupuestos Familiares, 1990/91*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1993; y segundo, id., *Desigualdad y pobreza en España: estudio base en la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1973-74, 1980-81 y 1990-91*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística / Universidad Autónoma de Madrid, 1996. Informe dirigido por, MARTÍN-GUZMÁN, Pilar [et al.]. A complementar con los trabajos de, LAFUENTE LECHUGA, Matilde, *Medidas de cuantificación de la desigualdad. La desigualdad de la renta según la E.P.F. 1990-91*, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 1994; ESTRUCH MAJÓN, Alejandro, *Desigualdad y política redistributiva: una estimación de la incidencia de los gastos sociales en España a partir de la EPF (1990-91)*, Barcelona, Cedecs Economía, 1996.

²⁴ Junto con la bibliografía apuntada tanto en el Capítulo “6. La «revolución burguesa pendiente»: las vicisitudes de la *única política posible* y/o el síndrome NHA” y en el Capítulo “7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de desarrollo”, entre otras decenas de estudios véanse, entre otros, ALONSO, Luis Enrique, *Historia del consumo en España: una aproximación a sus orígenes y primer desarrollo*, Barcelona, Debate, 1994; BRÄNDLE, Gaspar, “Consumo y cambio social en España: evolución del equipamiento doméstico (1983-2005)”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 120, (2007), pp. 75-114. Consúltense asimismo no pocos *estudios y barómetros de opinión* realizados por el CIS durante estos años. Muy significativos de los cambios de hábitos, de las nuevas preferencias y formas de diferenciación, junto con toda una serie de relevadores datos acerca de la importancia que adquirirá el consumo como factor de identidad y socialización. Entre otros posibles –junto con diversos informes sociológicos (Fundación FOESSA y similares)– RUIZ CANTERO, Josefa, *Actitudes y comportamiento de los españoles ante el consumo*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988; o, DÍAZ de RADA, Vidal, *Pautas de consumo y ahorro en los albores del siglo XXI*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001.

²⁵ Véase asimismo el cuadro que ofrecen, ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, *op.cit.*, p. 62 sobre la “Tasa de crecimiento medio anual” en UE-12, EE.UU. y Japón por décadas entre 1961 al 2000”. Así como el informe de la OECD, *Historical Statistics, 1960-1995*, Paris, OECD, 1997.

²⁶ Numerosos son los ejemplos. Por ejemplo, véanse en el Capítulo 7, *nota 3*, *nota 4* o *nota 131*.

Gráfico 3. Crecimiento anual del PIB de España en comparación con la CEE, 1982-1992



Fuente: INE, Eurostat, y elaboración propia.

Pero el tan citado *progreso*, el *salto adelante*, es cuando menos matizable si a continuación planteamos el asunto desde una perspectiva a largo plazo. Por ejemplo, desde el final de la Guerra Civil hasta el final de la década de los años noventa por abordar la más reciente historia contemporánea. Calculando, de hecho, la tasa media de crecimiento del PIB por décadas, resulta que, en conjunto, los años ochenta y noventa arrojan una evolución positiva no sólo menos acelerada sino bastante más baja en términos porcentuales, que con respecto a la etapa desarrollista del franquismo²⁷. Por ejemplo, los 5,24 puntos del PIBcf acumulados durante los años ochenta lejos quedan de los 8,13 puntos del PIBcf registrado durante la década anterior. En verdad, en este repaso por medio siglo se atraviesan una multitud de fases económicas cada una con sus características oportunas. Lo anterior no es obstáculo para confirmar la tesis antes enunciada. Eso sí, con el matiz que en su día introdujo José Luis García Delgado:

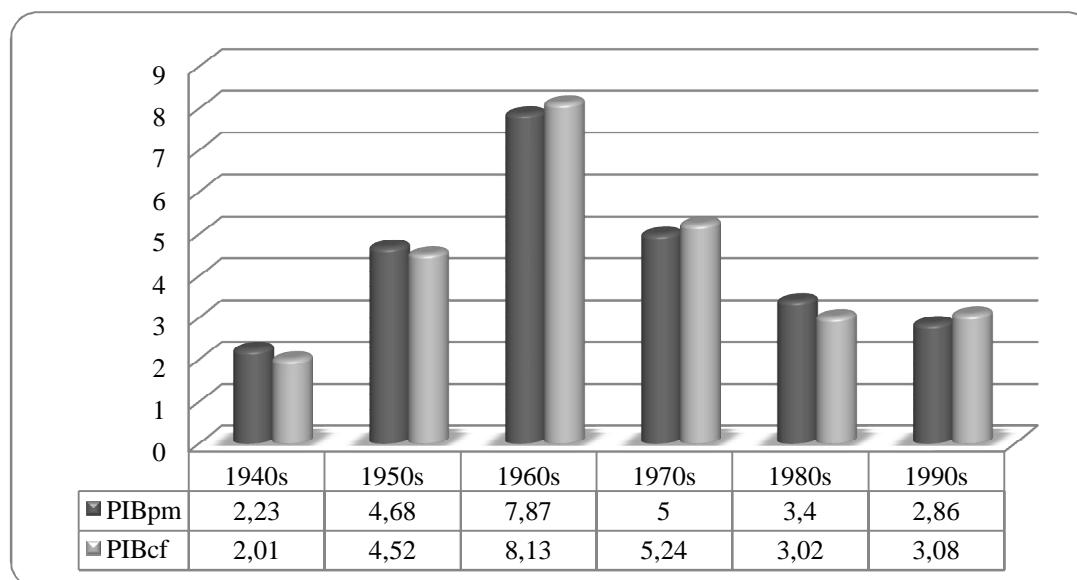
«[L]a etapa que se abre con la transición democrática y llega hasta hoy, puede ser considerada como la más lograda de nuestra industrialización. No es la que presenta un ritmo de expansión mayor, pero sí la que ha colocado a la economía española en mejores condiciones de un crecimiento sostenido»²⁸.

²⁷ Como advirtió el economista Julio Alcaide Inchausti «[e]ntre 1960 y 1975 la renta nacional de España, en términos de precios constantes, creció el 133 por 100, equivalente a una tasa anual del 5,8 por 100, que al referirse al nivel per cápita se limita al 4,7 por 100. Un crecimiento excepcional que sólo Japón pudo mejorar en aquellos años de un crecimiento económico mundial acelerado». Completando lo anterior con la siguiente descripción: «Es evidente que dicha etapa económica presenta claroscuros que, al ser resultados según la ideología de sus analizadores, cambian su valoración. Pero dígame lo que se quiera, el crecimiento económico que tiene lugar entre 1960 y 1975 permitió dar el salto económico a la sociedad española, abandonando el subdesarrollo para incorporarse al grupo de los países industrializados». ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, “Distribución sectorial, personal y factorial de la renta” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., p. 461. A modo de contravisión, de nuevo, GUERRERO, Diego, “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos...*, op.cit..

²⁸ GARCÍA DELGADO, José Luis, “Modernización económica y...”, op.cit., p. 28. Para una periodización, GARCÍA DELGADO, José Luis y JIMÉNEZ, Juan Carlos, “El proceso de modernización económica: perspectiva histórica y comparada” en id. (dir.), *España, economía...*, op.cit.. E igualmente para la evolución y transformaciones de la economía durante el siglo XX: NADAL, Jordi, CARRERAS, Albert y SUDRIÀ, Carles (comps.), *La economía española...*, op.cit.; TORTELLA, Gabriel, *El desarrollo de...*, op.cit.; HERNÁNDEZ ANDRE, Juan, *Fluctuaciones económicas en la España del siglo*

Otra conclusión igualmente relevante, qué duda cabe, es que el nuevo modelo de acumulación capitalista tanto en España como en los países occidentales, no recuperará, en adelante, la capacidad de crecimiento de los años dorados del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX, que, en cualquier caso, en nuestro país tendría un desarrollo bastante diferente²⁹.

Gráfico 4. Tasa media de crecimiento económico del PIB, 1940-1990 (%)



Fuente: INE, CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, GUERRERO, Diego, “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista”, figuraba 1(b) y elaboración propia.

Este repaso por los principales indicadores del PIB, y una vez verificados los límites y certezas de la tesis del crecimiento durante el periodo socialista, de forma necesaria debemos interrogarnos por algo tan básico como por la distribución de la renta personal durante la “década del cambio”. Un primer paso para acercarnos al *trade-off* entre crecimiento e igualdad. Sin salirnos del terreno macroeconómico emplearemos dos indicadores básicos: por un lado, la evolución y transformación del PIB per cápita así como los datos que proporciona Eurostat del

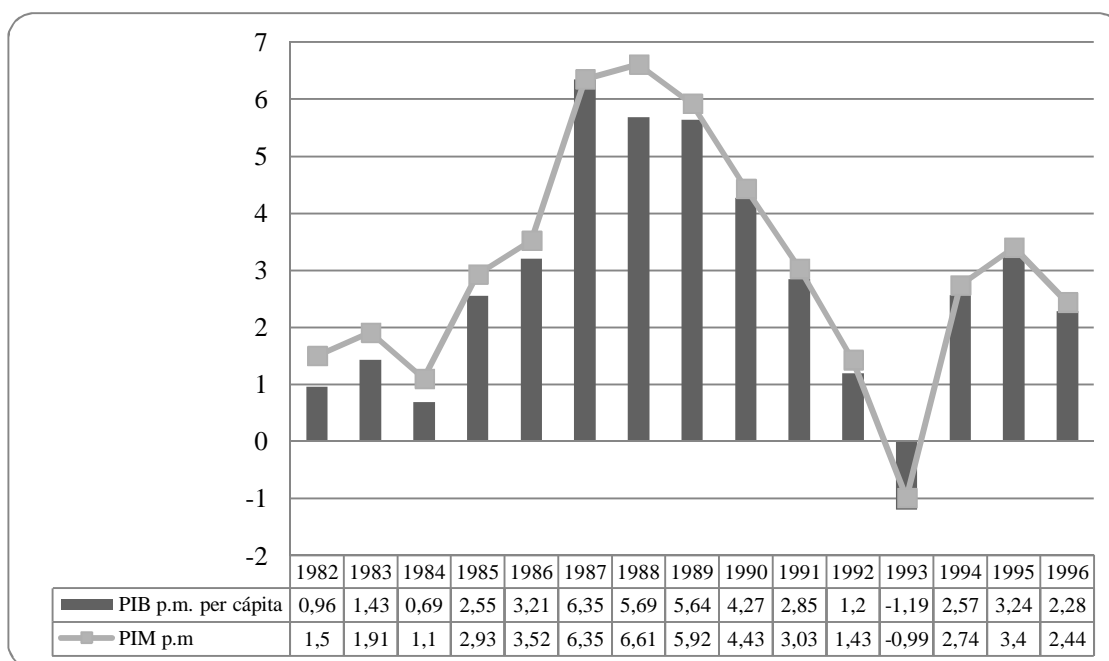
XX, Madrid, Abacus, 1995; y, FUSI, Juan Pablo y PALAFOX, Jordi, *España 1808-1996. El desafío de la modernidad*, Madrid, Espasa Calpe, 1997.

²⁹ «Casi dos décadas después de iniciada la crisis, el neoliberalismo no ha sido capaz de crear las condiciones necesarias para que el capitalismo la supere: aunque la tasa de beneficio se ha recuperado, todavía está muy lejos de los niveles que tenía antes de la crisis económica y que se requerirían ahora para iniciar una nueva fase de expansión de larga duración». ALBARRACÍN, Jesús, “Ideología, errores y malas intenciones” en id. [et al.], *La larga noche...*, op.cit., p. 46. En otro trabajo, el mismo autor señalaba como «[d]urante los últimos años, la acumulación ha vuelto a registrar tasas de crecimiento elevadas, pero la recuperación de la tasa de beneficio es todavía insuficiente, se encuentra un 15% por debajo de la existía en 1960 y más de un 20% por debajo de la de 1970». ALBARRACÍN, Jesús, “La extracción del excedente y el proceso de acumulación” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., pp. 318. Tesis confirmada en múltiples estudios a posteriori. Citaremos dos fundamentales. A nivel nacional: LÓPEZ, Isidro y RODRÍGUEZ, Emmanuel, *Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010)*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2010, y en concreto el capítulo “3. La onda larga del capitalismo hispano (1950-1995)”, pp. 135-177; a nivel internacional: BRENNERS, Robert, *La economía de la turbulencia global. Las economías capitalistas avanzadas de la larga expansión al largo declive, 1945-2005*, Madrid, Akal, 2009. Y, por otro lado, GLYN, Andrew, “The cost of stability: Advanced capitalist countries in the 80’s”, *New Left Review*, vol. I, nº 195, (1992); HUSSON, Michel, “Le débat sur le taux de profit”, *Inprecor*, nº 562-563, 2010. Todo ello junto con la obra de, WALLERSTEIN, Immanuel, *La crisis estructural del capitalismo*, México DF, Contrahistorias, 2005.

PIB por habitante en euros en paridad de poder de compra, para determinar el grado de convergencia económica durante estos años.

Observando el recorrido del valor del PIB per cápita de España y las variaciones del PIB en su conjunto ha de anotarse lo siguiente³⁰: las diferencias anuales acumulativas entre ambos indicadores durante la “década del cambio”. De lo que se deduce, siempre en términos macro, como el ritmo de crecimiento económico no se va a trasladar mecánicamente en una mayor y mejor distribución de la renta personal³¹. Así esta distancia, por pequeña que sea, conllevará un continuado desnivel entre ambas curvas –PIB_{pm} y PIB_{pm} per cápita– que, a su vez, evidencia un constante proceso de reajuste no siempre lineal. Con todo se ha de destacar la importante elevación del PIB per cápita en cerca de treinta puntos, lo que aproximará a España al “vagón” de los países más desarrollados³² [véanse en el “anexo” la *Tabla 10* y la *Tabla 11*].

Gráfico 5. Evolución comparada del PIB_{pm} per cápita en relación al PIB_{pm}, 1980-1996. Tasas de variación anual (%)



Fuente: CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)* y elaboración propia.

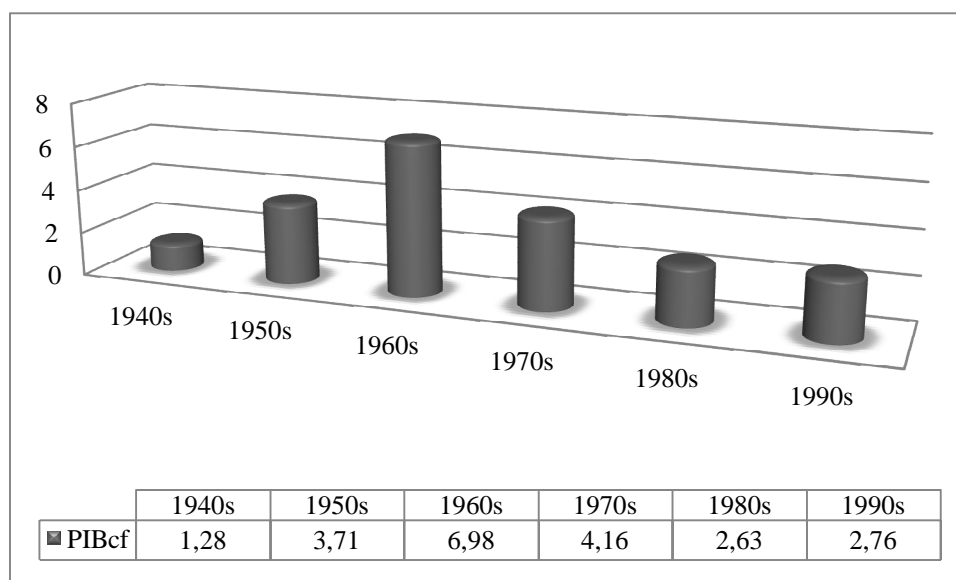
³⁰ Nos ceñimos aquí a lo planteado en su día por Fernando Esteve Mora al respecto: «[M]erece la pena reflexionar un poco sobre la medida en que el crecimiento del PIB_{p.c.} refleja el cumplimiento del criterio de eficiencia a la hora de alcanzar un mayor nivel de bienestar como parece que suele darse por sentado. Porque, sucede que tal crecimiento sólo indica que por término medio los individuos tienen a su disposición un mayor acervo de *algunos* tipos de bienes y servicios, pero ello no quiere decir que necesariamente hayan experimentado un incremento de su bienestar pues, a la vez, puede haberse dado ese crecimiento en la cifra del PIB_{p.c.} a costa del deterioro de otros elementos, de otros *valores de uso* [...], que también forman parte e influyen en el bienestar individual». ESTEVE MORA, Fernando, “Crecimiento y bienestar. La economía que no está en el PIB” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política...*, op.cit., p. 241.

³¹ Primero consúltese el documentado trabajo de, REMERO, Juan y PÉREZ, Javier, *Pobreza y desigualdad en los países en desarrollo*, Madrid, Síntesis, 1992; y asimismo consúltense los datos proporcionados por, MUÑOZ CIDAD, Cándido, “Consumo y nivel de vida” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., pp. 530-ss.

³² Referencias básicas de todo este proceso se pueden encontrar, en primer término, en las principales y referenciadas obras de Vicenç Navarro y del Colectivo IOE. Nos remitimos a la *Presentación*, nota 127.

Sin salirnos del ámbito nacional, por el momento, a la hora de englobar lo que supusieron estos diez años de política económica socialista procederemos a contextualizar este indicador, nuevamente, en una perspectiva a largo plazo. Cuando se repasa la evolución del PIB per cápita a lo largo de cinco décadas, el resultado –al igual que se ha presentado en el *Gráfico 4*– cuando menos es sorprendente, indiferentemente de la *óptica* adoptada. Si se deja de lado la situación de penuria de los cuarenta y la consecuencias del duro ajuste de los noventa, el crecimiento del PIB per cápita durante los ochenta marca el nivel más bajo de crecimiento de los últimos cincuenta años.

Gráfico 6. Evolución del PIBcf per cápita, 1940s-1990s (% del PIB)



Fuente: INE, CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, GUERRERO, Diego, “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista”, figuraba 1(a) y elaboración propia.

En la explicación de estas variaciones entre crecimiento/distribución no han faltado argumentos y contra-argumentos. No es para menos pues el cuestionamiento de las “virtudes” de la salida liberal por la que optaron los gobiernos socialistas es lo que se discute, junto a la resolución de los *trade-off* entre inflación/empleo y crecimiento/eqüidad. Con los datos por delante, en modo alguno pueden verificarse las prolíficas lecturas optimistas que ofrecieron los socialistas a la conclusión de sus diez primeros años al frente del Gobierno³³.

Las cifras evidencian una lectura cuando menos matizable. El PIB creció –de hecho en 1992 España era un 40% más rica que diez años antes convirtiéndose en la octava economía de los países de la OCDE³⁴ y creándose más de 300.000 nuevas empresas³⁵– como mejoraron otros tantos indicadores macroeconómicos. Lo que todo sumado indica que el país, a principios de los años noventa, era un país menos pobre cuantitativamente. Sin embargo, el *trade-off* entre crecimiento y equidad se había resuelto a favor del primero, con la consecuencia de una mayor desigualdad entre clases sociales³⁶. Una afirmación a calibrar oportunamente como se hará a lo

³³ Véanse, aquí de nuevo, los datos manejados por, COMÍN, Francisco, “La difícil convergencia...”, *op.cit.*.

³⁴ ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*, p. 110.

³⁵ Dato extraído de, TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 35.

³⁶ Aunque más adelante se volverá sobre esta cuestión, queden ya aquí apuntadas las siguientes referencias básicas al respecto: ESTEVE MORA, Fernando [et al.], *Modernización económica y...*, *op.cit.*; *desigualdad social*, Madrid, Caritas, 1992; ANALÍTICA, S.L., *Las desigualdades en...*, *op.cit.*; NOYA,

largo de los siguientes apartados. Pero no sólo, pues a pesar de ser más rico, el número de pobres relativos se incrementa en esta década de 8 millones a cerca de 11,5 millones según diversos estudios³⁷. Muy lejos, por tanto, de las frecuentes declaraciones desde los medios socialistas de una “reducción notable de la pobreza”³⁸.

¿Cómo se tradujo todo lo anterior en términos de convergencia con los países de la CEE? Pues el proyecto de la modernización/europeización como el horizonte deseable al que acceder, aunque no se supiera con exactitud las metas ni las fases, conllevaría una elevación automática del nivel de vida de los ciudadanos y trabajadores. Indudablemente mucho pesaría la “herencia recibida” y la crisis económica de los setenta, pero tanto o más cierto es que el proceso de adhesión al Mercado Único, primera meta del proyecto europeísta, tendría un alto

Francisco Javier y VALLEJOS, Antonio, *Las actitudes ante la desigualdad en España: resultados del estudio 2046*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995. Consúltese también el retrato de, PRADERA, Javier, “El doble lamento. La opinión pública ante el Estado del Bienestar”, *Claves de Razón Práctica*, nº 50, (1995), pp. 40-49. Desde una perspectiva socialdemócrata consúltense muchos de los trabajos contenidos en, MARAVALL, José M^a (ed.), *Dimensiones de la..., op.cit.*. Por ejemplo los de, CUENCA GARCÍA, Alicia [et al.], “El desarrollo del Estado del bienestar moderno del sur de Europa” (pp. 89-150); o el de, RUIZ-CASTILLO, Javier y SASTRE GARCÍA, Mercedes, “Desigualdad y bienestar en España en términos reales: 1973-74, 1980-81, y 1990-91” (pp. 345-366). Y en esta línea también, ÁVILA FRANCÉS, Juan [et al.], *Estado de bienestar..., op.cit.*. Todo ello junto con lo apuntado en su momento en el apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinarias”.

³⁷ «¿[C]ómo iba a haber 8 millones de pobres, con 3 años de Gobierno Socialista? No sólo esto, sino que 4 millones de ellos estaban en la pobreza severa, cuando en el año 70, eran 3 millones. En el año 88, a una institución poco sospechosa de manipular datos como es la institución de estudios del BBV, no le salieron 8 sino 11,5 millones de pobres». COLECTIVO IOE, “Características de la..., op.cit.”, p. 32. En todo caso, se debe de estar de acuerdo con Jesús de Miguel cuando afirma que «definir estadísticamente ‘pobreza’ como el 20% de las personas que menos tienen es una constructo estadístico». Primero por la «baja fiabilidad de la utilización de las encuesta para establecer umbrales de pobreza». Segundo, porque la «definición del 20% de umbral de la pobreza no añade mucho al conocimiento de la estructura social española. Más bien refleja una cierta obsesión por cuantificar un problema social sin resolverlo». Tercero, «[l]o importante pues no es saber si hay más pobres, sino si las personas se mueren antes». MIGUEL, Jesús de, *Estructura y cambio..., op.cit.*, pp. 277, 276, 278 y 297, respectivamente. Véase en este mismo trabajo su estado de la cuestión a partir de las premisas metodológicas establecidas por el citado autor (pp. 279-ss.). Dos estudios claves promovidos, primero, por Cáritas y luego conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –aunque el realizado con la colaboración de la administración pública no llegara a ser publicado– que incluso llegarían a remover más de una conciencia política ante las muy alarmantes cifras y realidades que se presentaban pueden encontrarse en: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA (EDIS), “Desigualdad y pobreza” en *Pobreza y Marginación*. Dossier monográfico, *Documentación Social*, nº 56/57 [extraordinario] (1984), pp. 39-122; y, SALINAS RAMOS, Francisco (dir.), *La pobreza en España: extensión y causas*, Madrid, Cáritas Española, 1986 [sobre su propia historia así como un estado de la cuestión, PÉREZ MORENO, Salvador, “El estudio de la pobreza en España desde una óptica económica: medidas y políticas”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. XXVII, nº 2, (2007), pp. 349-372] Posteriormente vendrían otros muchos. A destacar el de, CASADO, Demetrio, *Sobre la pobreza en España, 1965-1990*, Barcelona, Hacer, 1990. Consúltese asimismo el relevante informe del, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, *La pobreza y..., op.cit.*. Un estado de la cuestión para los años ochenta, LLÉS LAZO, Carlos, “Los estudios sobre la pobreza y exclusión social en la España de los 80: una visión sintética”, *Documentación Social*, nº 76, (1989), pp. 173-188, dentro del dossier monográfico *Riqueza y pobreza*. Por último, consúltense el siguiente informe a nivel europeo: EUROSTAT, *Poverty in figures: Europe in the Early 1980*, Luxembourg, Statistical Office of European Communities, 1990. Complémentese lo anterior con lo citado, entre otras referencias, en el Capítulo 2, nota 242.

³⁸ FERNÁNDEZ BLANCO, Matilde, “Las políticas sociales en la década de los ochenta. Importancia y vigencia de las políticas de bienestar social” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del..., op.cit.*, p. 263.

coste económico y social que se reflejaría en el lento y contradictorio proceso de convergencia europea³⁹.

Así pues, no será hasta 1987 cuando se recupera el nivel del “año del cambio” en relación a la evolución PIB per cápita España/UE-15⁴⁰. No obstante, se cierra la década aquí estudiada con seis puntos más en términos de convergencia, pero con tan sólo tres puntos de diferencia con respecto a 1978 (76,1 sobre 100). Una evolución harto significativa que evidencia cuanto menos tres rasgos consustancial del modelo económico español: primero, la perpetuación del histórico diferencial con Europa; segundo lugar, la errática evolución que de esta misma variable en este tiempo histórico concreto; y tercero, los efectos directos atribuibles de las políticas de modernización en la mejora en la capacidad de compra de cada habitante⁴¹.

De este modo, y a pesar una vez más de las *lecturas triunfalistas*, se vuelve a demostrar que lejos de la pretendida normalización con Europa –insistimos siempre en términos macroeconómicos– deben relativizarse los éxitos socialistas [véase en el “anexo” la *Tabla 12*].

8.2. En busca del «mana»: las vías de la internacionalización de la economía española

Hasta aquí el computo global de una década de profundos y continuados cambios de la estructura socioeconómica del país. Corresponde explorar tanto el desarrollo como los resultados de los tres ejes del proyecto de la modernización socialista, así como su vinculación con el nuevo modelo productivo. En dicha labor, invertiremos el orden expositivo inicial.

En primer lugar, cabe preguntarse por las consecuencias, resultados y demás efectos de la política de apertura de la economía del país, leída en clave de desregulación y liberalización del tejido productivo⁴². Una primera conclusión sobresale: la liberalización internacional de la economía fue uno de los logros más significativos de los gobiernos socialistas⁴³. Como se señaló en su día aquello se constituyó en el triunfo de la “primacía del mercado frente al anquilosado dirigismo económico desplegado durante buena parte del siglo XX”⁴⁴. De este modo, junto con el fin de las políticas proteccionistas residuales de un pasado cercano, la apertura del mercado español se operaría sin contemplaciones siempre en busca de atraer el mayor número de capital privado posible.

Dentro del proceso de inserción en la *nueva lógica* de la competitividad internacional, en una coyuntura en donde el tejido productivo español distaría durante los ochenta de ser

³⁹ Nos remitimos aquí, primero, al apartado, “6.2.4. El embrujo de la *retórica modernizante*”, y en segundo lugar, al apartado “7.1.3. “Del «recalentamiento» económico a Maastricht: el *Programa de Convergencia* (1989-1990/1992)”.

⁴⁰ De cara a evaluar a más largo plazo este proceso histórico se toma por referencia la “Europa de los Quince” (UE-15) en vez de la “Europa de los Doce” (UE-12).

⁴¹ Con todo el *salto* en la convergencia no fue menor. «España avanza desde un producto per cápita, que era a comienzos de la década de los años sesenta [...] poco más de la tercera parte del de la Comunidad Europea (35,8 de índice para España y 100 para la Comunidad), hasta un PIB per cápita próximo a los dos tercios de la media comunitaria en 1997». MUÑOZ CIDAD, Cándido, “Consumo y nivel de vida” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía..., op.cit.*, p. 534.

⁴² Una aproximación crítica y necesaria en, GONZÁLEZ CALVET, Josep, “La liberalización como estrategia socialdemócrata”, *Mientras Tanto*, nº 38, (1989), pp. 23-42.

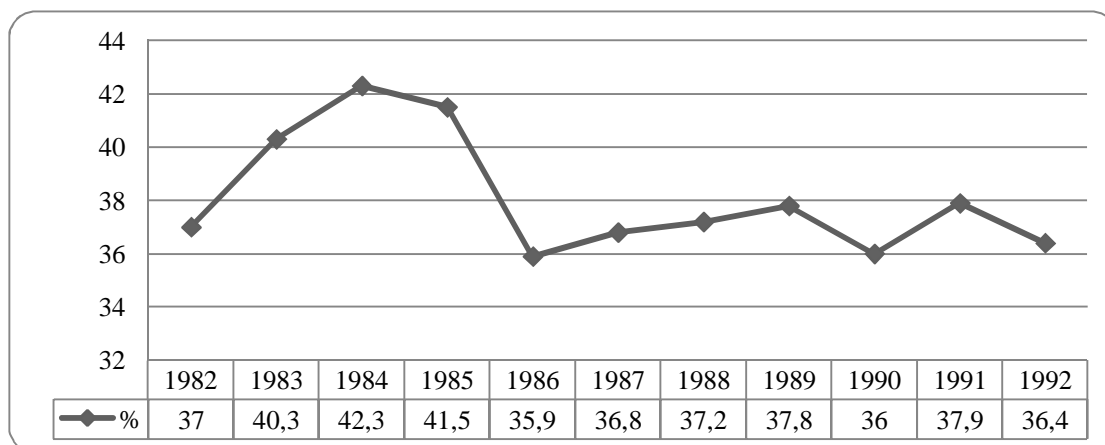
⁴³ «Hoy puede decirse que en lo que se refiere al intercambio de bienes y servicios, la economía española, como las otras de la Unión Europea, es una de las más abiertas del mundo, aunque en el apartado de los servicios el proceso no haya hecho más que empezar». SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad..., op.cit.*, p. 38. Véase también el trabajo de, CHISLETT, William “The Internationalization of the Spanish Economy”, *Documentos de Trabajo. Elcano Royal Institute of International and Strategic Studies*, 2002.

⁴⁴ GARCÍA DELGADO, José Luis y JIMÉNEZ, Juan Carlos, “El proceso de modernización económica: perspectiva histórica y comparada” en id. (dir.), *España, economía..., op.cit.*, 26.

competitivo, se combinarían múltiples medidas en tal objetivo. Aunque muchas de las decisiones adoptadas respondían, invariablemente, a las exigencias del Tratado de Adhesión, tampoco se dudó en ir más lejos cuando fue necesario⁴⁵.

Los datos macroeconómicos disponibles vienen a confirmar la impresionante transformación en este sentido. En primer término, si observamos la tasa de variación con respecto al grado de apertura del PIB en relación al comercio exterior de bienes y servicios, se constata un notable incremento sostenido en el tiempo, especialmente significativo durante la primera legislatura para posteriormente en años sucesivos atenuarse⁴⁶. La necesidad de cumplir con los criterios de entrada en el Mercado Único aceleraría el proceso de apertura entre 1983 a 1985 a ritmos no conocidos. Un aspecto, igualmente, comprobable al examinarse el grado de apertura financiera y el grado de apertura comercial [consúltense en el “anexo” la *Tabla 13*].

Gráfico 7. Evolución del grado de apertura del mercado español, 1982-1992 (% sobre el PIB)



Fuente: INE (SEC-95) y elaboración propia.

En lo que se refiere propiamente al balance entre importaciones y exportaciones de bienes y servicios, desde los niveles bajísimos de finales de la década de los setenta –por ejemplo en 1978 las importaciones eran tan sólo constituían el 13,6% y las exportaciones el 14,3% en relación con el PIB– la economía española va a registrar en este campo también un significativo *salto*.

Una apertura que se comprueba al evaluar el comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB, tanto a nivel comunitario como extracomunitario. Así la intensificación de exportaciones de bienes y servicios hacia los países de la UE se constituirá en un proceso muy intenso entre 1982 a 1985, cuando aumenta cinco puntos sobre el PIB. Por otro lado, la posterior atenuación de estas cifras se debe no tanto a la caída de inversiones sino a mayor ritmo en el crecimiento del PIB, lo que disminuye en términos porcentuales las cifras finales en este campo. De hecho, todos los datos disponibles siempre va en la misma dirección cuando hablamos de exportaciones: los países europeos como destino fundamental de nuestros productos [consúltense en el “anexo” la *Tabla 14*, la *Tabla 15*, la *Tabla 16* y la *Tabla 17*].

Por otro lado, a partir de las anteriores tablas, queda también claro como el equilibrio entre importaciones y exportaciones durante estos años, responderá a una particular situación del mercado español en relación al aumento de la dependencia exterior de determinados bienes

⁴⁵ Un proceso ampliamente retratado en, FUENTES QUINTANA, Enrique, *El modelo de...*, op.cit..

⁴⁶ Consúltense el completo trabajo de, ALONSO, José Antonio y DONOSO, Vicente, “Sector exterior: Apertura económica y líneas de especialización” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., pp. 207-240.

y servicios, de los productos energéticos y concretamente de I+D⁴⁷. Interesa, por tanto, aunque sea de forma sintética, preguntarse, primero, por la estructura por productos y la ventaja comparativa revelada a la hora de las importaciones y exportaciones, tanto en relación con los productos primarios, las semi-manufacturas y las manufacturas industriales; segundo, el coste que tendrá para las importaciones el precio del petróleo en porcentaje del PIB, y en relación, a esto último la participación del propio petróleo en el consumo de energía primaria en una perspectiva comparada a nivel europeo.

De los datos de las *Tabla 18*, *Tabla 19*, *Tabla 20*, *Tabla 21* y la *Tabla 22*, se comprueban otras tres no menores conclusiones: primero, la mejora de la posición competitiva del país en términos globales, aunque se sigue arrastrando no pocos lastres de épocas anteriores y que merman, en suma, la posición competitiva del país; segundo, el impacto que tendrá la reducción del coste del petróleo en las cuentas del Estado; y tercero, la cambiante posición de España en el comercio mundial al ritmo de los ciclos económicos internacionales.

A pesar del ostensible ascenso de la posición internacional de la nación, otros tantos problemas seguirán distorsionando la marcha económica del país. El más grave, sin duda, el déficit comercial. Como se insistió en páginas anteriores, España entre 1987 y 1988 llegaría a ocupar el primer lugar mundial en déficit comercial. En 1990 el mismo representaba por sí sólo el 6,1% del PIB con 3,6 billones de pesetas de balance negativo. Si se examina además la evolución del déficit comercial de aduanas –véase, de nuevo, la *Tabla 14*– puede observarse como junto con la persistente debilidad en el saldo exterior heredada de la década de los setenta, esta situación tan sólo podrá ser reconducida a niveles de los primeros ochenta, diez años después en plena recesión de la economía del país y una vez implementadas las políticas de *enfriamiento*.

Una realidad que tiene su correlación al analizar la evolución del saldo de la balanza por cuenta corriente, que pasa de una situación mediamente saneada en 1982 –685 millones de euros en positivo– a un intenso empeoramiento especialmente notable a finales de los años ochenta –por ejemplo, entre 1987 a 1988 se pasará de 868 millones de euros a -3.863 de euros para el año siguiente duplicarse negativamente a -7.977 millones de euros– cerrándose en 1992 con unos datos alarmantes: -10.729 millones de euros. Asimismo, la evolución del saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente entre España y la UE es considerable, siempre leído en términos negativos [véanse en el “anexo” la *Tabla 23*, la *Tabla 24* y la *Tabla 25*].

Por lo demás, en la *Tabla 23* puede acreditarse como la “regla de oro del equilibrio externo”, en palabras de Guillermo de la Dehesa, se cumplió hasta 1989 y no se volvió a recuperar hasta 1992. Como destacó el mismo autor: “[L]a inversión extranjera no ha sido suficiente para compensar dicho déficit, lo que demuestra que la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión nacional ha sido mayoritariamente financiada por entradas de capital autónomas a largo plazo”⁴⁸. De cualquier de las formas, la operación de internacionalización de

⁴⁷ «En suma, tanto los datos sobre el comercio de servicios tecnológicos como la información sobre la importación de bienes de equipo y recepción de capital extranjero sugieren que la economía española ha dependido y sigue dependiendo intensamente de las inversiones extranjeras. Esta idea se refuerza, además, al considerar las limitaciones que se observan en el nivel y estructura de los esfuerzos de I+D realizados en nuestro país. De manera que, en el contexto de la UE España se perfila como una economía con una capacidad tecnológica débil y desacorde con su nivel de desarrollo económico». MARTÍN, Carmela, “La situación tecnológica: cambio técnico y política tecnológica” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 370.

⁴⁸ DEHESA, Guillermo de la, “Balance de la...”, *op.cit.*, p. 69. Y del mismo autor unos años antes, id. [et al.], *Las inversiones extranjeras...*, *op.cit.*. Según datos ofrecidos por el propio PSOE, «entre 1982 y 1992, la economía española ha recibido flujos de inversión extranjera que asciende a más de 10.3 billones de pesetas lo que, sin duda, evidencia la confianza de los inversores extranjeros, en nuestro potencial de crecimiento». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria de gestión de los órganos federales [al] 33 Congreso del PSOE. Madrid, 18, 19 y 20 de marzo de 1994”, Madrid, marzo de 1994, sig. Fc 1378, p. 25. Y por último consúltense los datos manejados en, DURÁN HERRERA, Juan José, “Veinticinco años de

la economía del país triplicara la inversión extranjera a partir de 1986, pasando de 2.029 millones de euros en aquel año a 8.216 millones de euros en 1992. Uno los grandes objetivos de los estrategias económicos socialistas, aunque fuera al precio que acabamos de ver. Una cuestión que todavía queda más clara cuando se procede a establecer la relación real de intercambio que se obtiene del cociente entre los precios de las exportaciones y los precios de las importaciones expresados a partir de los índices de precio, y que, en suma, muestra una variable sobre la posición competitiva de una economía [véase en el “anexo” la *Tabla 26*].

La marcha nacional e internacional de la economía nacional durante estos años no es entendible tampoco sin tener presente la más que favorable evolución de los saldos financieros con la CEE. Con todo se ha de ser prudente en este campo a la hora de las interpretaciones. En el imaginario colectivo común del país existe, con mayor o menor nitidez, la idea preconcebida de España como uno de los mayores receptores de estos flujos financieros y monetarios, lo que a la postre permitiría solventar no pocos problemas derivados de la propia adhesión europea.

Desde la *academia liberal* no se ha dejado de insistir, por ejemplo, como “las Perspectivas Financieras 1988-1992 [...] hicieron posible la reforma de los fondos estructurales y acompañaron la realización del Mercado Único Europeo”⁴⁹. Fuera a través de la Política Agraria Común (PAC) o directamente a través de los Fondos de Cohesión Económica y Social, se calcula que estas ayudas, según la Comisión Europea, supusieron entre 1989 a 1993 el 0,7% del PIB, el 2,9% de la inversión en formación bruta de capital fijo y permitieron reducir un 0,6% la tasa de paro⁵⁰.

Ahora bien, estos pueden resultar cuando menos engañosos como denunció Juan Francisco Martín Seco:

«El tema es especialmente grave en España que se encuentra a la cola de todos los países pobres en cuanto a la cuantía de la ayuda comunitaria. Mientras que Irlanda recibió en 1990 como aportación neta el 5,7% de su PIB, y Grecia y Portugal el 4,7% y el 1,2%, respectivamente, España recibió tan sólo el 0,5%, es decir, la aportación neta de Portugal en términos relativos es más del doble que la española, y las de Grecia e Irlanda multiplican las de nuestro país por más de 9 y 11 veces, respectivamente. A la misma conclusión se llega si se analizan las tasas de cobertura (cociente entre el dinero recibido y aportado a la Comunidad). En 1989, para Irlanda, Grecia y Portugal eran del 461%, 452% y 243%, respectivamente, mientras

inversión directa española en el exterior, 1978-2003: una senda de crecimiento”, *Economía Industrial*, nº 349-350, (2003), pp. 147-154, dentro del monográfico *Economía y Constitución: XXV aniversario*. Y más ampliamente, MEJORADO HOYOS, Ascensión, *Los determinantes micro y macroeconómicos del déficit comercial en España: 1954-1994*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1996.

⁴⁹ JORDÁN GALDUF, Josep M^a, “Balance de la integración de España en la Unión Europea”, *Información Comercial Española*, nº 811, (2003), p. 123, a partir del Cuadro 6 “Efectos económicos estimados de las acciones estructurales de la UE en España (% del PIB, de la formación bruta de capital fijo y de la tasa de paro)”.

⁵⁰ Datos extraídos de, ibídem, p. 126, y a partir del Cuadro 6, “Efectos económicos estimados de las acciones estructurales de la UE en España (% del PIB, de la formación bruta de capital fijo y de la tasa de paro)”. El mismo autor aporta los siguientes datos en relación con las ayudas europeas para 1990-1992: FEOGA-Garantía, 2.586 millones de euros; FEOGA (e IPOP), 387; FEDER, 1.479 millones de euro; FSE, 590 millones de euros; otros, 189. En total: 4.853. Cifras, no obstante, bajas cuando se comprueba las cantidades para 1993-1999 –9.959 millones de euros en total– y para 2000-2002 –12.667 millones de euros–. Datos extraídos del Cuadro 4 “Ingresos recibidos por España de la UE (Promedios anuales, en millones de euros a TC fijo 1-1999)” (p. 124), a partir de los datos proporcionados por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, MAPA. Asimismo véanse las aportaciones de, GONZÁLEZ BLANCH, Francisco, “El Fondo de Cohesión Económica y los criterios de convergencia con la UE”, *Boletín Económico ICE*, nº 2474, (1995), pp. 33-34; NIETO SOLÍS, José A., “El presupuesto de la Unión Europea ante la reforma del Tratado de Maastricht”, *Documento de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid*, nº 6, (1997); y, FUENTE, Ángel de la, “El impacto de los fondos estructurales: convergencia real y cohesión interna”, *Hacienda Pública Española*, nº 165, (2003), pp. 129-148.

que la de España se situaba en el 130%, por debajo incluso de la de los Países Bajos, 141%, y casi igual a la de Dinamarca, 120%»⁵¹.

A partir de estos *sugere*ntes datos, véanse la *Tabla 27* y la *Tabla 28* sobre la evolución global de los saldos financieros España-CEE, que de una balanza negativa de -50,52 millones de euros pasaría en tan sólo seis años a 1.990,85 millones de euros. Unas ayudas comunitarias que para el mismo periodo, y según el tipo de actuación, se destinarían de la siguiente forma: 1.008 millones de euros para infraestructuras; 362 millones de euros para ayuda a empresas; y, 798 millones de euros para capital humano. En total, 3.096 millones de euros⁵² [véase también en el “anexo” la *Tabla 28*].

Aunque cabría añadir no pocas características sobre la posición internacional de España en el mercado exterior, y concretamente en torno a su capacidad competitiva o el tipo de productos exportados, estas cuestiones desbordarían en mucho las pretensiones de este trabajo⁵³. Pero si es relevante detenerse momentáneamente por dos aspectos para entender en qué tipo de ventajas comparativas se basó el mercado nacional, de cara a atraer las esperadas inversiones privadas extranjeras. Junto a la reducción de los costes laborales unitarios, la reducción del déficit o la inflación, la política monetaria y crediticia jugaría un papel fundamental. En ambos aspectos, el Gobierno, con el apoyo firme del Banco de España, tendría una relativa autonomía en el marco de unos estrechos límites de actuación. La instrumentalización del cambio efectivo de la peseta –una vez que se tiene en cuenta los resultados entre exportaciones e importaciones– tuvo un objetivo central: la mejora de la competitividad de la economía española basada en una moneda barata⁵⁴.

⁵¹ MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Quiebra del modelo económico español” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, op.cit., p. 142. Véase, asimismo, los abundantes datos aportados en su momento por, SOSVILLA RIVERO, Simón, “La economía española y la política de cohesión europea” en *Política Económica en España*. Dossier monográfico, *Información Comercial Española*, n° 837, (2007), pp. 211-230, quien a partir del modelo macroeconómico HERMIN-España le permite comparar como hubiera sido la evolución de la economía español sin las citadas *ayudas europeas*.

⁵² Datos extraídos, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, *Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006 para las Regiones Españolas del Objetivo 1)*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / FEDER, 2001. Las cifras están expresadas en millones de euros del año 2000. Igualmente, véase aquí, CLOSA, Carlos, “La cambiante posición de España en la Unión Europea”, *Política y Sociedad*, n° 20, (1995), pp. 111-124.

⁵³ En cualquier caso no deje de leerse la versión ‘oficial’ al respecto que brindaron en su día, BONILLA HERRERA, José M^a y BUISÁN, Ana, “El entorno exterior y la demanda externa” en SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA (ed.), *El análisis de la economía española*, Madrid, Alianza, 2005, pp. 271-308. E igualmente véanse los números la revista nacida en el año 2000 dedicada precisamente a esta importante cuestión: *Economía exterior: estudios de la revista política exterior sobre la internacionalización de la economía española*.

⁵⁴ Véanse como referencias básicas, junto con otras ya citadas previamente: VIVES, Xavier y GUAL, Jordi (dirs. y coords.), *Concentración empresarial y competitividad: España en la CEE*, Barcelona, Ariel, 1990; ESPINA, Álvaro, *Hacia una estrategia española de competitividad*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1995. Y más cercano a nuestro presente, el dossier monográfico de *Información Comercial Española*, n° 829, (2006), titulado, *Productividad y competitividad de la economía española*. De lo que son imprescindibles la lectura de los siguientes textos: ESTRAGA GARCÍA, Ángel, PONS, Alex y VALLÉS, Javier, “La productividad de la economía española: una perspectiva internacional” (pp. 7-25); BEL i QUERALT, Germà, CALZADA, Joan y FAGEDA, Xavier, “Liberalización y competencia en España: ¿dónde estamos?” (pp. 123-144). Un año después la también revista de economía, *Economistas*, vol. XXV, n° 11, (2007), publicada un monográfico bajo el rotulo: *El déficit exterior, ¿es sostenible?* en donde destacaba al respecto de lo que aquí se está tratando el trabajo de, FEITO HIGUERUELA, José Luis, “Competitividad, productividad y déficit exterior” (pp. 6-11). Por último, SANCHO, Francisco I. y GARCÍA SOLANES, José, “Movilidad internacional de capitales e integración financiera de la economía española”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. VII, n° 21, (1990), pp. 29-60.

Por lo demás, se ha insistido lo suficientemente en el “rostro monetario” que adquiriría la política económica socialista. Un asunto que queda ampliamente comprobado con los “vaivenes” por los que atravesaría la peseta en esta década, ya fuera a través de su apreciación o devaluación. Un último instrumento que, de hecho, sería empleado con fines políticos y económicos. Los resultados de esta política monetaria serían dispares cuando no contraproducentes. Como advirtió, una vez más, Guillermo de la Dehesa con respecto a la cambiante política sobre la peseta a través de las sucesivas tres devaluaciones habidas durante los noventa: “[L]o único que consiguen con cada devaluación es empobrecerse, ya que reduce el poder de compra de los salarios al aumentar el precio de los productos de importación en moneda nacional y aumentar posteriormente la inflación en toda la economía”⁵⁵.

Se presentan a continuación dos tablas a través de las cuales pueden analizarse las consecuencias de la política cambiaria durante los gobiernos socialistas. En la primera, dedicada al entorno internacional, se bosqueja la evolución del tipo de cambio de la peseta tanto con respecto a la libra, el franco francés y el dólar. En este último caso se esboza tanto las tasas de variación como el propio tipo de cambio. Datos que deben relacionarse con los planteados en la *Tabla 21*. A poco que se indague, puede verificarse los efectos directos de la política monetaria seguida en la búsqueda de la mejora de la competitividad y del intercambio comercial. Especialmente indicadoras resultan las cifras que arrojan las devaluaciones llevadas a cabo durante la primera de mitad de los noventa –a pesar de que nos salgamos temporalmente de nuestro periodo cronológico– en la correlación que tienen en términos de comercio mundial. En la segunda tabla, dedicada a mostrar las tasas de variación del tipo de cambio efectivo nominal, se combina, además, con el cambio efectivo real tanto con precios de consumo como en relación a los costes laborales unitarios⁵⁶. Un cuadro donde igualmente se visualizan los resultados de una política monetaria especialmente intensa y determinante durante la primera legislatura socialista en el afán del proyecto modernizador [consúltense en el “anexo” la *Tabla 29* y la *Tabla 30*].

En relación a la política crediticia se seguirá una similar lógica. Una estrategia basada en atraer inversiones y capital privado a un alto interés para financiar el proyecto modernizador. La búsqueda de la “confianza” de los mercados se constituyó en una dura y larga batalla por parte de los técnicos socialistas por y para recuperar la credibilidad de la economía del país. Aquí entraban factores no sólo económicos sino también políticos una vez más. Es decir, garantizar a nivel exterior una estabilidad institucional a corto y medio plazo con el fin de reducir futuros y posibles riesgos económicos e incrementar nuestra credibilidad internacional.

Traducido lo anterior, en términos de mercado, significaba emprender una serie de reformas políticas de carácter estructural en base a la “doctrina liberal” dominante del momento. *Reformas* que tuvieron en el ámbito financiero su más acabado ejemplo. Pero no sólo, pues junto a la recuperación de la citada “confianza”, entraban también en juego las políticas de ajuste destinadas a reducir la inflación y el déficit público.

Asimismo este proceso conllevaría lo que, en términos económicos, se conoce como una “retribución extra” para conseguir que los inversores extranjeros entraran en el mercado nacional⁵⁷. Una *retribución extra* que puede también verificarse sin mayores inconvenientes en

⁵⁵ DEHESA, Guillermo de la, “Balance de la..., *op.cit.*, p. 65. Y en concreto véase lo ya explicado en el apartado, “7.1.3. “Del «recalentamiento» económico a Maastricht: el *Programa de Convergencia* (1989-1990/1992)”.

⁵⁶ Recuértese que sobre los *costes laborales unitarios* se fijaron todas las atenciones de los economistas gubernamentales, constituyéndose en la «variable clave» de su ofensiva. ALBARRACÍN, Jesús, “La política económica y el empleo” en id. (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, p. 150.

⁵⁷ Una *retribución extra* que no siempre se dirigía a inversiones productivas: «El estado necesita de recursos [y] emite bonos del Tesoro los cuales tiene que ofrecer un tipo de interés alto para atraer el ahorro privado, que también puede escasear. Estos tipos de interés son más altos que la media general de beneficios que se obtienen en un momento de crisis en el conjunto de las actividades productivas de la

las dos tablas que se muestran a continuación. Así España tendría los intereses más altos durante buena parte de la década que nos ocupa⁵⁸. En relación, tanto a los tipos de interés a corto como a los de largo plazo durante la “década del cambio” estuvieron siempre por encima de la media de la UE⁵⁹. No casualmente, las mayores subidas de los tipos de interés vienen a coincidir con los periodos de mayores dificultades económicas en estos diez años, lo que, a medio plazo, terminaría afectando, de forma, considerable, a la variación de la deuda pública a largo plazo del país [véanse en el “anexo” la *Tabla 31*, la *Tabla 32* y la *Tabla 33*].

¿Cómo y por qué vías se tradujeron todos los anteriores elementos en el primer y más buscado objetivo económico de los técnicos socialistas, que no era otro que atraer inversiones de capital privado? Por lo visto hasta ahora los técnicos socialistas cumplieron con *nota* los “deberes” en la configuración de las “condiciones necesarias” –apertura exterior, bajada de aranceles, política crediticia y una política cambiaria altamente favorable para el capital privado...-. El primer y más importante resultado sería la llegada en “masa” de las inversiones

economía. Por lo que los particulares y los empresarios prefieren invertir en activos financieros sin riesgo, que en otro tipo de actividad que, además de ofrecer un beneficio menor, tienen un cierto riesgo. El sector público detrae recursos del ahorro privado. Estos recursos no tienen tampoco un fin claramente productivo, ya que la inversión pública no está desempeñando un papel activo y dinámico en el proceso de recuperación, sino que financia actividades con alto grado de ineficacia y gastos de defensa». BERZOSA, Carlos, “La política económica del PSOE. Condicionantes y presupuestos” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., p. 74.

⁵⁸ NAVARRO, Vicenç, “Neoliberalismo, desempleo, empleo...”, op.cit., p. 43. La explicación de las líneas maestras fueron explicadas en su día por Fernando Esteve Mora y Rafael Muñoz de Bustillo de la siguiente manera: «Como apoyo a la política de rentas, y en sustitución de ésta cuando no hay acuerdo entre los representantes sociales (patronal, gobierno y sindicatos) se potencia la utilización de una política monetaria estricta que vía control del tipo de interés (mediante el control de la liquidez del sistema) pretende evitar las generaciones de presiones de la demanda sobre el nivel de precios. Esto hará que aumenten de forma importante los tipos de interés reales que tomarán por primera vez valores positivos llegando a ser los más elevados de los países avanzados de la OCDE». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, p. 23.

⁵⁹ Visiones generales así como específicas –además de las ya señaladas a la hora de explicar la política monetaria desarrollada por los socialistas– extraordinariamente claras de lo que se está señalando se pueden localizar en el siguiente conjunto de trabajos: DEHESA, Guillermo de la, “Tipo de cambio, tipo de interés y movimientos del capital”, *Economistas*, vol. II, nº 11, (1984), pp. 46-50, dentro del dossier monográfico *España 1984: un balance*; FERNÁNDEZ PÉREZ, Eduardo, “Tipos de interés real en España y en los siete países más industrializados”, *Papeles de Economía Española*, nº 24, (1985), pp. 313-317; RAYMOND BARRA, José Luis y PALET, José, “Factores determinantes de los tipos reales de interés en España”, *Papeles de Economía Española*, nº 43, (1990), pp. 144-160; FERNÁNDEZ PÉREZ, Eduardo, “Evolución reciente de los tipos de interés en España y en la Comunidad Europea”, *Papeles de Economía Española*, nº 52-53, (1992), pp. 286-303; MARTÍNEZ MÉNDEZ, Pedro, “Fiscalidad, tipo de interés y tipo de cambio”, *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 9116, (1993); ESTRADA GARCÍA, Ángel, SASTRE de MIGUEL, Mª Teresa y VEGA CROISSIER, Juan Luis, “El mecanismo de transmisión de los tipos de interés: el caso español”, *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 9408, (1994); MARTÍNEZ-ABASCAL, Eduardo, “Comportamiento de los tipos de interés en España: 1987-95”, *Análisis financiero*, nº 70, (1996), pp. 86-97; GARCÍA MOLTALVO, José, “Tipos de interés a corto plazo en España”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. VI, nº 18, (1998), pp. 5-25; RICO BELDA, Paz, “Estructura temporal de los tipos de interés y crecimiento económico en España”, *Documento de Trabajo. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas*, nº WP-EC 98-28, (1998); MONTÁVEZ GARCÉS, Mª Dolores y BAJO RUBIO, Óscar, “Tipos de cambio, expectativas y nueva información: la peseta, 1986-1996”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. VIII, nº 23, (2000), pp. 71-92. Y en concreto, FUENTES PASCUAL, Ramón, *Los tipos de interés en la economía española: factores determinantes y evidencia empírica*, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1994; y, LÓPEZ LIZ, José, *Los tipos de interés, una incógnita permanente: estudio práctico jurídico-económico de su evolución última*, Madrid, Marcial Pons, 1996.

privadas extranjeras como quedo reflejado en la *Tabla 22*. Aunque como se discutirá más adelante difícilmente puede hablarse de que una vez alcanzada la “eficiencia económica” – siempre, claro está, desde la perspectiva gubernamental– se avanzara el mismo tramo hacia la “eficiencia social” en un sentido redistributivo de la renta; lo cierto es que sin querer adelantar acontecimientos, tanto la tasa de inversión privada como el ahorro privado se vieron altamente recompensados a partir de estas políticas liberalizadoras. Y con ello, la Formación Bruta de Capital Fijo como principal indicador para determinar la evolución inversora de capital en una economía en un tiempo concreto.

Se ha advertido, por lo demás, en páginas anteriores que uno de los primeros síntomas de la salida de la crisis sería la rápida mejora del FBCF reflejado en la mejora de la inversión privada sobre el PIB, durante los cuatro primeros años de gobierno. De hecho, los años 1985 y 1986 son los que mejores tasas presentaron en el cómputo global de la contabilidad nacional.

Sumado a la política de liberalización e internalización económica, el Ejecutivo socialista emplearía mayoritaria cuando no sesgadamente la inversión pública en este afán. El Estado con un rol claramente intervencionista se transformaría en un agente activo de la economía en la dirección del fomento del capital privado. He aquí uno de los principales puntos de apoyo del mismo proyecto modernizador. Aunque en el apartado dedicado al déficit público se matizarán no pocas cuestiones, se puede adelantar ya el importante papel de la inversión pública en el FBCF. Un gasto destinado básicamente a la mejora de las infraestructuras públicas –consúltese la *Tabla 40* sobre el número de kilómetros de autopistas y autovías, junto con otros indicadores habituales de cara a *medir* el esfuerzo inversor estatal en esta dirección– junto con otras partidas⁶⁰. De los datos que arrojan los siguientes cuadros puede afirmarse que, en líneas generales, se alcanzó tal objetivo, aunque no se revirtieran del todo muchas de las inercias del anterior periodo en términos de inversión⁶¹.

Sin poder llegar a afirmar que se trató de un claro y rotundo “triunfo” del capital extranjero, lo cierto es que se asiste a una verdadera re-acumulación de las ganancias del capital privado. El 7% de crecimiento de media del FBCF durante estos años, junto a la evolución del stock de capital privado, así lo certifican. Un aspecto que también se comprueba cuando atendemos a la creación neta de empresas, el índice de la Bolsa de Madrid o directamente la evolución que siguen los Activos Líquidos en Manos del Público (ALP)⁶² [consúltese en el “anexo” la *Tabla 34*, la *Tabla 35*, la *Tabla 36*, la *Tabla 37*, la *Tabla 38*, la *Tabla 39* y la *Tabla 40*].

⁶⁰ Véase la estructura general de gasto en dichas partidas en, FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 177. Y asimismo en otro de los trabajos de la anterior obra colectiva: SÁENZ de COSCULLUELA, Javier, “Las obras públicas. Las infraestructuras”. E igualmente, consúltese también las cifras ofrecidas por, BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, pp. 187-189.

⁶¹ «En el momento en que se desencadena la crisis, de cada 100 pesetas que se producían en España, 27 se daban a la inversión. Diez años después, en 1983, invertíamos tan sólo 18 pesetas de cada 100. Pues bien, durante la etapa de recuperación se cambia la anterior tendencia, aquellas 18 pesetas se transformaron en 24 en 1988 y en 25 durante 1989». COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Recuperación económica y...”, *op.cit.*, p. 13.

⁶² Sobre su introducción en la economía española y sus efectos más inmediatos véase, ARGANDOÑA RAMÍZ, Antonio, “Tres años de control de los activos líquidos en manos del público”, *Papeles de Economía Española*, nº 32, (1987), pp. 46-62.

8.2.1. La «obsesión enfermiza»

El segundo gran reto, convertido en la práctica en una “obsesión enfermiza” para los dirigentes socialistas⁶³, sería el control de una inflación disparada desde mediados de la década de los setenta. En este sentido, se impondrán a través del Ejecutivo, con consenso o no, con un siempre maltrecho *dialogo social* o no, un amplio conjunto arsenal de medidas que, desde el paradigma liberal, “combatirían” el que sería calificado como el principal problema de la economía española, junto con la incapacidad de atenuar las tasas de desempleo masivo.

Como se ha dejado constado sobradamente tanto en el Capítulo 6 como en el Capítulo 7, el punto nodal de la economía política del socialismo español basculó en torno a esta misma cuestión.

Tras los Pactos de la Moncloa y las políticas anti-inflacionistas que le siguieron, tan sólo sería a partir de las medidas de ajuste ortodoxo emprendidas por los ministros de economía socialistas, cuando, por fin, comenzaría a reducirse la inflación de forma paulatina⁶⁴. Una política anti-inflacionista con un alto coste social y laboral cuando no político. Más allá de los *trade-off* a los que se enfrentaron los equipos económicos, y cuyas consecuencias se irán desgranando, en cierta medida este grave problema que aquejaba a la economía del país sería ahora reconducido a niveles europeos. Ahora bien, si esto es atribuible en exclusiva al denominado “arsenal de medidas” racionales es lo que se discute, junto con sus diversas consecuencias *ad hoc*⁶⁵.

Controlada las previas y altas fluctuaciones inflacionarias de los setenta, el creciente excedente empresarial no siempre conllevó la creación de empleo ni tampoco proporcionó automática y necesariamente una mejora de la competitividad y productividad de la economía. Dicho en otras palabras. No se conocería en la década de los ochenta y menos en la de los noventa, aquel siempre citado “círculo virtuoso” por parte de los técnicos socialistas.

El esquema de la recuperación previsto –como ya se adelantó– no se cumpliría. Dejando por el momento apartada esta cuestión, el siguiente *Gráfico*, junto con las dos tablas que lo acompañan, es revelador de la situación de partida y su posterior evolución. Una evolución que también puede constatar, primero, cuando se calcula el IPC con el deflactor de consumo privado en una perspectiva comparada España/UE; y segundo, cuando también se examina el

⁶³ En palabras de, MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Quiebra del modelo económico español” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, 139, quien añadía: «El déficit público no posee la gravedad que se le pretende dar y, desde luego, no se le puede juzgar exclusivamente desde la pura óptica macroeconómica. Aunque suene extraño, podemos afirmar que existen déficits buenos y malos. Lo importante –me atrevería a decir– no es su tamaño, sino su composición». *Ibidem*, p. 150. Por su parte Fernando Esteve y Rafael Muñoz en su crítica a la política económica del Gobierno socialista que asocian directamente a las recetas de la síntesis neoclásica –véase Capítulo 7, *nota* 257– señalarían: «En suma, la oposición al déficit público que tanto programática como en la práctica ha sido uno de los elementos que ha formado la política económica del ejecutivo socialista carece en principio de esa justificación teórica así como la consiguiente renuncia a una política pública activa de recuperación que se ha dejado en manos de la iniciativa privada el cuándo y el cómo de la misma». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, p. 46.

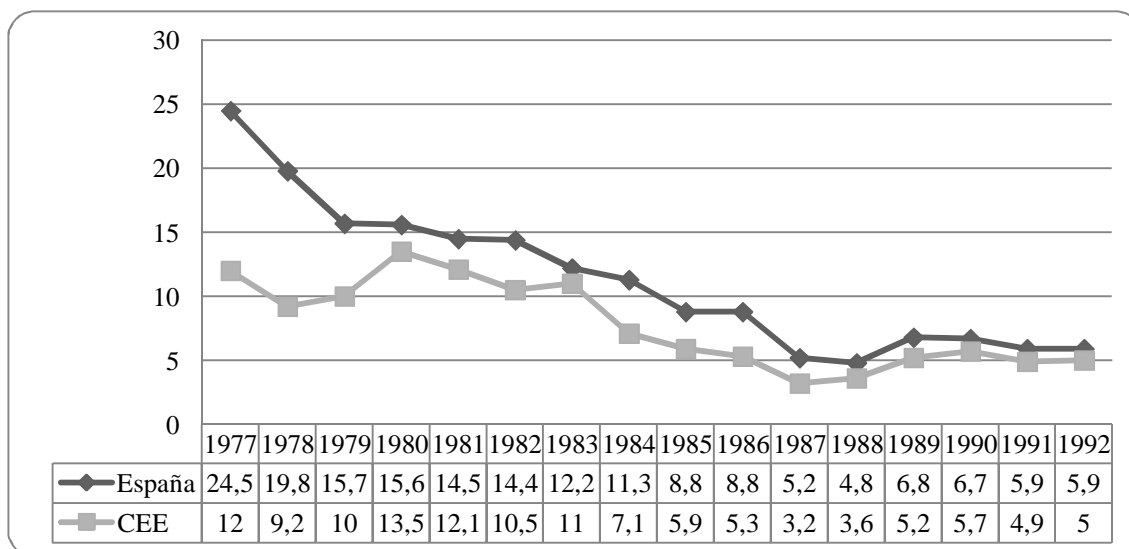
⁶⁴ Nos remitimos aquí, primero, al apartado “4.2.2.1. Construcción de un socialismo para la conquista del poder político (1977-1979)”, y en segundo término, al apartado “9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. *Los arduos inicios de la flexibilización* (octubre 1976-marzo 1980)”.

⁶⁵ FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 152. Véase también el trabajo de, SERRANO MARTÍNEZ, Lorenzo, “Convergencia e inflación: un enfoque estructural”, *Documento de Trabajo. Centro de Estudios Monetarios y Financieros*, nº 9401, (1994).

Índice de Precios de Servicios y de Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE) como un indicador complementario del IPC.

En todo caso, mientras que la tasa de inflación en 1977 duplicaba prácticamente a la media de la CEE, tan sólo a mediados de los años ochenta, y en concreto durante los años ochenta siete y ochenta y ocho, se conseguirá atenuar esta diferencia a menos de dos puntos. Con todo, el diferencial acumulativo seguirá constituyendo un preocupante problema al final de la “década del cambio” [consúltense en el “anexo” la *Tabla 41* y la *Tabla 42*].

Gráfico 8. Evolución comparada de la tasa inflación anual entre España y la CEE, 1977-1993 (%)



Fuente: INE, Eurostat, y elaboración propia.

Tres instrumentos centrales se emplearían en esta denodada lucha contra el problema inflacionista. A saber, la política presupuestaria examinada en capítulos anteriores, una política ortodoxa monetaria así una muy agresiva política de contención salarial. A diferencia de las dos primeras cuestiones en donde el Ejecutivo contaría con una cierta autonomía; en relación a la estrategia de contención salarial al por sí limitado margen de maniobra inicial, se llevaría a cabo una política de rentas salariales que chocaría en más de una ocasión con las resistencias y recelos de las principales centrales sindicales⁶⁶.

En este sentido, la negociación colectiva –con o sin concertación social de por medio, insistimos– jugaría un papel clave en la moderación de los costes laborales dentro de la lógica “ajuste positivo”⁶⁷. Una negociación colectiva que, en la práctica, se limitó durante los

⁶⁶ Nos remitimos a lo ya explicado en el apartado “6.2. La «salida progresista» de la crisis” y en términos generales al estudio de caso presentado en el Epígrafe “IV. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”.

⁶⁷ Muy significativos serían los datos y argumentos esgrimidos por el que fuera Director General de Política Económica durante la segunda mitad de la década de los ochenta y por tanto uno de los máximos responsables de la negociación colectiva. Nos referimos a, GARCÍA de BLAS, Antonio, “Algunas reflexiones sobre la negociación colectiva en España en el último quinquenio” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, op.cit., vol. II, pp. 859-880. Y esta misma línea otro de los máximos responsables de Trabajo durante todo este tiempo: ESPINA, Álvaro, “Una evaluación dinámica de la negociación colectiva en España (1976-1994): del intercambio político a la cooperación”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25/26, (1994), pp. 269-294.

gobiernos socialistas a la mera cuestión salarial, dejando en un plano secundario otras tantas cuestiones relacionadas con las condiciones y los derechos de los trabajadores⁶⁸.

Por lo demás, cabe también advertir que la progresiva extensión de la “cultura empresarial de la temporalidad”, desvincularía a cada vez un mayor sector de la población asalariada de los acuerdos salariales tanto por la vía jurídica –en primer término, a través de la exclusión *de facto* de los trabajadores temporales de los convenios en una prolongada fase⁶⁹– como a través de la vida diaria en los centros de trabajo. Pero no sólo, pues la entrada de los *outsiders* hay que relacionarla, obligadamente, con el fenómeno depresivo sobre la masa salarial en su conjunto. Así de media sus salarios serían un 35% inferior al de los trabajadores fijos⁷⁰.

⁶⁸ Aunque en el estudio de caso que se presenta en el Epígrafe IV –véase la *nota* 66– profundizaremos en esta cuestión, y además con la amplia bibliografía ya presentada en el apartado “2.2.3. “Estudios y aproximaciones a la concertación social, la negociación colectiva, la política de rentas y las reformas del mercado de trabajo”, véanse los siguientes trabajos de carácter general para este tiempo: LORENTE HURTADO, José Ramón, “Negociación colectiva y empleo en España” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, *op.cit.*, vol. III, pp. 711-736; ROSAT ACED, Carlos (coord.), *Guía práctica de la negociación colectiva*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995; GIRÁLDEZ, M^a Teresa, PÉREZ INFANTE, José Ignacio y SIMÓN PÉREZ, Hipólito J., *Situación actual de la medición de la cobertura de la negociación colectiva en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002; PÉREZ INFANTE, José Ignacio, “Negociación colectiva y salarios. Aspectos metodológicos, evolución y situación actual”, *Arxius*, n^o 18, (2008), pp. 55-74. Igualmente consúltese el interesante dossier monográfico de, *Economía y Sociología del Trabajo*, n^o 18, (1992) dedicado precisamente a esta cuestión. Entre otros textos claves allí contenidos: DURÁN LÓPEZ, Federico, “La negociación colectiva y el sistema de relaciones laborales” (pp. 8-18); MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Estructura y proceso de la negociación colectiva” (pp. 19-26); y, MUGA ROBLEDÓ, Antonio, “Estructura y cobertura de la negociación colectiva en España” (pp. 27-35). Y desde perspectivas claramente liberales que abogan por *flexibilizar y liberalizar* la negociación colectiva, BENTOLILA, Samuel y JIMENO, Juan F., “La reforma de la negociación colectiva en España”, *Documentos de Trabajo. FEDEA*, n^o 2002-03, (2002). Informes internacionales claves sobre este aspecto en, OIT, *La negociación colectiva ante la recesión en los países industrializados con economía de mercado*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986; y unos años más tarde véase otro informe de la OIT traducido al castellano en, WINDMULLER, John, *Nueva consideración de la negociación colectiva en los países industrializados*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.

⁶⁹ Primero ha de tenerse presente como no sería hasta el cambio metodológico de la EPA en 1987, cuando se comenzarían a incluir a los trabajadores temporales como tales en dicha encuesta; y segundo, también se ha de tener en cuenta como tras la Ley 32/1984 los trabajadores temporales se encontrarían excluidos *de facto* de la negociación colectiva. Situación que no se modificaría hasta años después [véase el apartado “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”]. Referencias claves para interpretar lo anterior en, GARCÍA de POLAVIEJA, Javier, *Estables y precarios...*, *op.cit.*; y TOHARÍA, Luis (dir.), *El problema de...*, *op.cit.*. Por lo demás, tan sólo a partir de los años noventa –como ocurría con otros tantos temas relacionados con el mercado de trabajo y que evidenciaban el claro sesgo *insider* de las fuerzas sindicales mayoritarias– la UGT denunciaría claramente la penosa situación por la que atravesaban decenas de miles de *outsiders*: «La consolidación de un sector periférico de trabajadores –en precario, en la economía sumergida, en actividades de servicios formada por pequeñas unidades– a los que no sólo no les cubren los convenios sino que ni siquiera se les aplican las leyes vigentes». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al IV Comité Confederal Ordinario. Gestión I”, Madrid, 28 y 29 de noviembre de 1991, sig.ant. A/40/02, p. 23.

⁷⁰ AHFFLC, INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS, “Informe sobre coste y políticas de rentas”, Madrid, febrero 1991, sig. 1600-010, p. 10. Valga por el momento, añadir como en el citado documento en relación a evolución de los salarios entre 1986 a 1990, es decir, en pleno *boom económico*, se remarcaba allí como uno de los más graves efectos negativos de la entrada masiva de trabajadores con contrato por tiempo definido en el mercado de trabajo había sido el siguiente: «Dado que los incrementos reales en convenio han sido mayores que la remuneración real por asalariado que indica la Contabilidad Nacional, hay que deducir que la incorporación masiva de nuevos asalariados, con contrato temporal, se ha producido [...] [con] salarios inferiores a los de los trabajadores fijos, lo que ha tenido su efecto

Un conjunto de datos son relevantes al respecto. Aunque entre 1982 a 1992 el número total de convenios de empresa se incrementaron –pasaron de 3.385 a 4.928 en las fechas extremas indicadas– y afectó a un mayor número de empresas y de trabajadores –de 6.262,900 a 7.640,200 trabajadores, respectivamente– no obstante, la tasa de cobertura apenas se incrementó en tres puntos. Esta cuestión todavía queda más gráficamente expresada en los convenios por empresa y el número de trabajadores afectados por los mismos, pues es realmente a este nivel donde los representantes de los trabajadores pueden, en la práctica, mejorar, de forma sustancial, las condiciones salariales y de trabajo⁷¹. Así el descenso en la tasa de cobertura que se obtiene de promediar el número de trabajadores afectados por convenios de empresa sobre el total de trabajadores afectado por convenios macro, refleja una paulatina pérdida del “poder negociador” sindical. Todo lo anterior viene a expresar, otra vez, el efecto de la llegada de los “outsiders” al mercado de trabajo [véanse en el “anexo” la *Tabla 43* y la *Tabla 44*].

Hasta 1989 cuando el Gobierno renuncia a pronosticar la inflación se perseguiría que el incremento salarial anual estuviera por debajo o igualado a lo sumo del IPC⁷². Otra de las muchas “recetas” liberales antes que socialdemócratas. Esta particular política de carácter tanto *económico* como *ideológico* se constituiría en una de las principales “batallas” frente a las dos principales centrales sindicales del país –UGT y CCOO–. Tras los Decretos-Ley que acompañaron a los Pactos de la Moncloa y las posteriores medidas contenidas en el AMI y en el ANE, durante los seis primeros años de gobierno socialista (1982/1983-1989) bien a través del AI, y luego a través del AES y posteriormente a raíz de las “recomendaciones gubernamentales”, no siempre se conseguiría contener la *temida* subida salarial anual. La siguiente tabla evidencia, en conjunto, el papel que jugaría tanto la normativa salarial pactada o no como la negociación colectiva en este campo. Todo ello con una nota añadida ya advertida, las constantes desviaciones en las previsiones gubernamentales a la hora de calibrar la subida de la inflación⁷³ [consúltense en el “anexo” la *Tabla 45*].

depresor sobre el aumento de la masa salarial de la economía y consiguientemente sobre los incrementos del salario real por persona». *Ibídem*, p. 8.

⁷¹ Sobre esta cuestión atiéndase, nuevamente, a los criterios metodológicos expuestas en, ROCA, Jordi, “Evolución de los salarios y evolución del discurso «oficial» sobre los salarios” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, pp. 208-212.

⁷² Sobre el papel del Gobierno desde la propia perspectiva gubernamental, de nuevo, ESPINA, Álvaro, “Política de rentas: El papel del Gobierno en el proceso de negociación colectiva en España”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 115-124.

⁷³ Dos explicaciones son lo suficientes claras para no extendernos más sobre esta cuestión. Primero, como recordó Jesús Albarracín: «[E]l crecimiento de los salarios de convenio ha estado hasta 1987 por debajo del IPC. Esto ha sido posible gracias a unos mecanismos de pactos sociales en los que se fijaban unas bandas salariales que estaban en correspondencia con unas previsiones gubernamentales de inflación que, sistemáticamente, eran inferiores a las reales del año precedente. En los años en los que no se realizó ningún acuerdo social, el crecimiento salarial tampoco se despegó significativamente de las previsiones de inflación que el gobierno realizaba en los Presupuestos Generales del Estado». ALBARRACÍN, Jesús, “La política económica y el empleo” en *id.* (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, pp. 148-150. Y en segundo lugar, como planteó Jordi Roca para los primeros años ochenta: «La desviación más clara fue la de 1984 pero desviaciones mucho menores se produjeron en 1982, 1985 y 1986. Los errores en la previsión de inflación actúan como mecanismo redistributivo cuando no se establece ningún tipo de indexación de los ingresos como era el caso de los funcionarios y la mayor parte de contratados por las administraciones públicas y el de los perceptores del salario mínimo; en los casos de negociación colectiva, el mecanismo actúa cuando la indexación es sólo parcial y/o no incluye a todos los trabajadores». ROCA, Jordi, “La distribución de la renta entre las clases sociales” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, pp. 604-605. Por su parte para la organización socialista a través de su siempre ambiguo lenguaje político –ya plenamente ‘liberal’ en el sentido de no cuestionar en ningún caso el modelo de crecimiento elegido– avalaría este mecanismo a partir del argumento de que el mismo era fruto de un (supuesto) *consenso* entre los agentes sociales: «El consenso, además, había conseguido desde el inicio de la recuperación que los salarios no se fijasen según la inflación pasada, con lo que se evitaba la indexación. Sin esta referencia los incrementos nominales de las retribuciones no habrían permitido que la reestructuración del sistema productivo se hubiera

El coste más inmediato de la política de moderación salarial lo constituirá la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. La evidencia estadística es concluyente⁷⁴. Junto a las cifras ya esbozadas en líneas anteriores, y antes de entrar en más disquisiciones, los datos aportados por la propia Contabilidad Nacional a través del INE –a saber los *oficiales*, a pesar de todas las dudas y sospechas que se ciernen sobre ellos en esta época– indican en el momento en que se compara la inflación real con la evolución de los salarios pactados por convenio –tomado como el indicador que afectaba a un mayor número de trabajadores, una vez descartados los funcionarios públicos y otros colectivos no sujetos a los mismos– una aguda primera fase depresiva salarial entre 1983 a 1986, para revertirse dicha situación en una segunda que iría entre 1986 a 1992. A pesar del proceso de alza salarial durante esta segunda fase, la misma a duras penas permite obtener un saldo positivo al final del periodo. De 1982 a 1986 los salarios por convenio arrojan una pérdida de 7,44 puntos a un ritmo de 1,489 puntos anuales; y entre 1987 a 1992 la masa salarial por convenio ganaría 8,85 puntos a una media anual de 1,475. Una subidas siempre cuestionadas por el Gobierno en múltiples ocasiones⁷⁵.

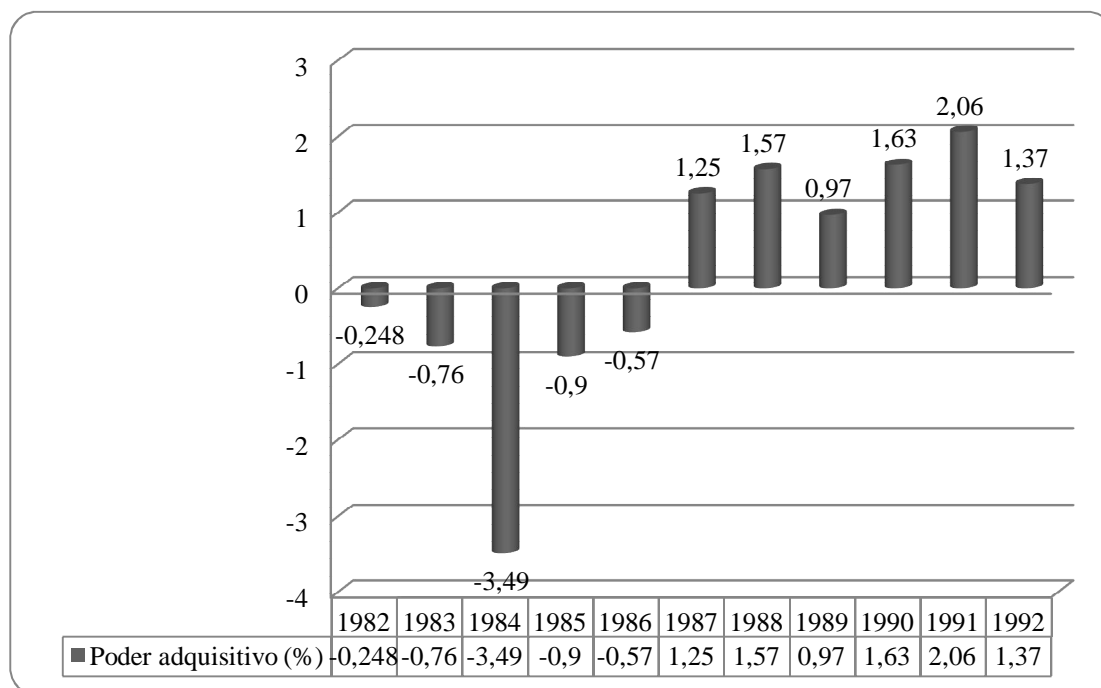
En términos globales, los salarios tan sólo crecerán 1,40 en un país que había duplicado su PIB y en donde el IPC acumulado anualmente había sido, simplemente, sobresaliente. Queda clara la progresiva pérdida global del poder adquisitivo así como las secuelas de las políticas de ajuste de la primera legislatura socialista, y a su vez el *efecto arrastre* del 14-D de 1988. A continuación se presentan dos tablas, junto con un *Gráfico*, que confirman esta particular evolución salarial [consúltense en el “anexo” la *Tabla 46* y la *Tabla 47*].

transformado en mejoras sustanciales del empleo y de las rentas percibidas. Y el propio gasto público habría sido más inflacionista, privando de recursos financieros al consumo y a la inversión, motores en definitiva del proceso». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria Política y de Gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso. Madrid 9-11 Nov. 1990”, Madrid, noviembre de 1990, sig. Fc 912, p. 22.

⁷⁴ Para una visión global a partir de datos ‘oficiales’, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Distribución salarial en España*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1992. Revisiones recientes a nivel internacional en, MILANOVIC, Branko, “Nuevo cálculo de la desigualdad global: consecuencias de las nuevas estimaciones de la paridad del poder adquisitivo (PPA)”, *Sistema*, nº 217, (2010), pp. 3-17.

⁷⁵ A modo de ejemplo véase, Noticia, “Economía recomienda moderación salarial y flexibilidad en los convenios para crear empleo”, *El País*, 9 de abril de 1988. Al albur de la presentación de un extenso informe desde el Ministerio de Economía, el Secretario de Estado Guillermo de la Dehesa criticaría fuertemente los incrementos salariales: «Se acusa a las centrales sindicales de actuar con gran rigidez en la negociación de los convenios y centrarse en la fijación de los salarios, primando poco la productividad, lo que ha obligado a los empresarios a realizar un ajuste de empleo mayor del necesario para reducir los costes por unidad de producto y así compensar los aumentos salariales». Unos meses después el economista Carlos Berzosa cuestionarían seriamente las tesis del Ministerio de Economía ofreciendo un conjunto de datos y reflexiones, a partir de los cuales desmontaría cada uno de los anteriores argumentos. Destacando lo siguiente: «Sin embargo, queda por demostrar de qué manera unos salarios menores generan unos beneficios más altos y, sobre todo, si realmente este excedente se invierte en negocios productivos generadores de empleo, a la vez que hay que demostrar que una mayor inversión pueda crear empleo». BERZOSA, Carlos, “¿Son los sindicatos y los salarios responsables del desempleo?”, *El País*, 5 de julio de 1988.

Gráfico 9. Evolución del poder adquisitivo salarial a través de la negociación colectiva en España entre 1982 a 1992



Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y elaboración propia.

Si concretamos más y observamos los datos que proporcionó en su día la Comisión Consultiva Nacional de Convenios dependiente del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social⁷⁶, en torno a la evolución de la tasa acumulada de los salarios pactados por convenios desde 1981, teniendo presente la subida anual del IPC, nuevamente la hipótesis sobre la pérdida de capacidad adquisitiva se vuelve a comprobar sin mayores dificultades⁷⁷.

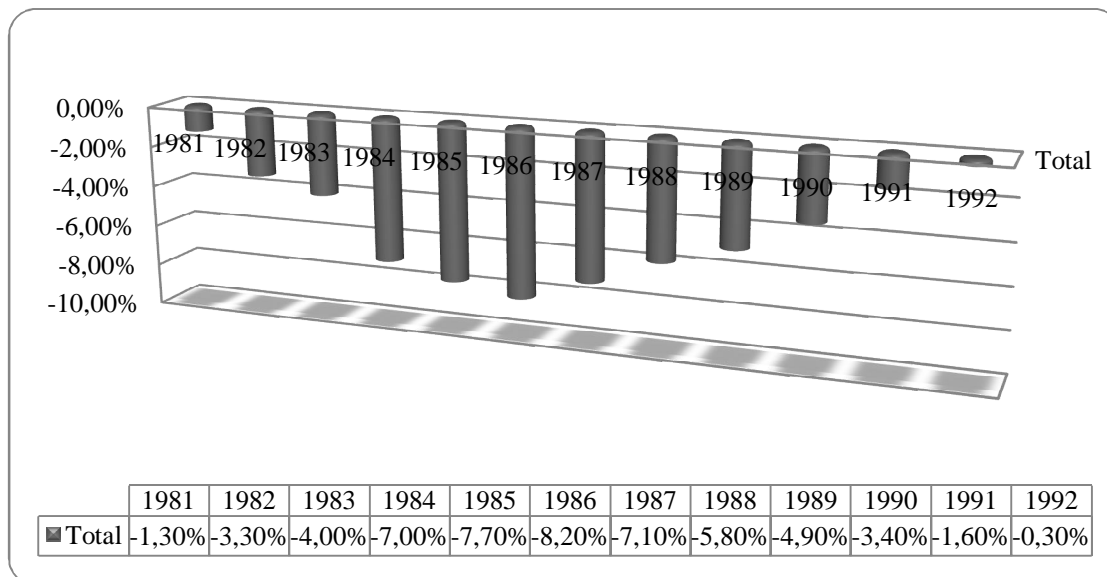
De cara a amplificar esta cuestión en las dos tablas que acompañan al *Gráfico 10*, se ha decidido incluir también los datos por convenios de empresas así como en otros ámbitos, tanto a nivel acumulado como a nivel anual. Resulta así que, desde esta perspectiva. Incluso durante el periodo de mayor crecimiento económico, entre 1986 a 1990/1991, no se consigue, a pesar de las

⁷⁶ COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS, *El contenido de los Convenios Colectivos: contenido normativo y contenido obligatorio* [II Jornadas de Estudios sobre Negociación Colectiva, Madrid 24 y 25 de noviembre 1988], Madrid, Ministerio de Trabajos y Seguridad Social, 1990; id., *Los problemas actuales de la negociación colectiva* [VI Jornadas de Estudio sobre la Negociación Colectiva, Madrid, 3 de junio de 1993], Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994; id., *Empleo, contratación y negociación colectiva* [XI Jornadas de Estudio sobre la Negociación Colectiva, Madrid, 4 y 5 de junio de 1998], Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / Subdirección General de Publicaciones, 1999. E igualmente, id., *Estado social y autonomía colectiva: 25 años de negociación colectiva en España* [XVII Jornadas de estudio sobre negociación colectiva, Madrid 17 y 18 de junio de 2004], Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / Subdirección General de Publicaciones, 2006. No deje de consultarse su página web: www.mtin.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm. E igualmente, sobre sus funciones y valoraciones nos remitimos a la bibliografía ya citada en el Capítulo 2, nota 88. Asimismo véanse los informes anuales de, MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, *La negociación colectiva en las grandes empresas...*, para entre los años 1984-1992. A completar también con entre otros estudios 'oficiales' con el de, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Estructura y contenidos básicos de la negociación colectiva en España: datos de 1986*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.

⁷⁷ Para la base inicial de este proceso, FERNÁNDEZ GRUTOS, Rafael (dir.), *La negociación colectiva y las estadísticas salariales*, Madrid, Ministerio de Trabajo / Instituto de Estudios Sociales, 1980. Por lo demás, véase Capítulo 2, nota 602 y nota 604.

subidas salariales apuntadas, revertir la situación negativa existente desde principios de la década de los años ochenta [véanse en el “anexo” la *Tabla 48* y la *Tabla 49*].

Gráfico 10. Evolución de la tasa acumulada desde 1981 en relación a los salarios pactados en convenios, a nivel total, 1982-1992



Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y elaboración propia.

Las cifras reseñadas en la *Tabla 50* y en la *Tabla 51* sobre la *ganancia media por trabajador y mes en jornada normal y extraordinaria* así como *el coste laboral por trabajador y mes*, respectivamente –y que de forma necesaria han de relacionarse con la *Tabla 9* entre otras– son complementarias con lo dicho hasta ahora.

De cara a ampliar esta importante cuestión han de emplearse otros indicadores de diferente naturaleza metodológica. Primero, a través de la información proporcionada por Eurostat. Al igual que sucede con las definiciones técnico-metodológicas sobre el paro/desempleo y otras variables, esta base de datos aplica otros baremos a la hora de calibrar la evolución del salario real⁷⁸. Así pues, si se examina el comportamiento del salario real por persona empleada en una perspectiva comparada entre España y la UE, aunque las diferencias salariales se nos aparecen menores, puede confirmarse también la pérdida de poder adquisitivo global de los asalariados⁷⁹. Un segundo indicador relevante lo proporciona la siempre fiable base de datos del Modelo Hermin-España, que ofrece datos similares tanto en relación a la evolución del salario real como en relación al salario real neto para este periodo [consúltense en el “anexo” la *Tabla 50*, la *Tabla 51*, la *Tabla 52* y la *Tabla 53*]

⁷⁸ De nuevo, nos remitimos al apartado “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

⁷⁹ Por ejemplo, y sin ánimo de ofrecer más datos de los necesarios, se remarcaba en un informe del Instituto Sindical de Estudios la siguiente situación a principios de los años noventa, muy significativa de la tónica que se había seguido desde la llegada de los socialistas: «El aumento de la remuneración real per cápita de los asalariados ha sido en el último trienio [1988-1990] inferior en España al correspondiente a ocho de los doce países comunitarios. Solamente tres de ellos muestran incrementos reales menores: Holanda e Irlanda cuyos incrementos están cercanos a lo de nuestro país y Dinamarca que es el único Estado que presenta un crecimiento negativo de salarios reales en período». Concluyendo: «Con estos datos no es posible seguir manteniendo que la evolución salarial de nuestro país ha sido más moderada que en el resto de los comunitarios». AHFFLC, INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS, “Informe sobre coste y políticas de rentas”, Madrid, febrero 1991, sig. 1600-010, p. 11.

Por lo demás, tiene también un enorme interés fijarnos a continuación en la evolución del SMI durante este periodo⁸⁰. Un interés que en este caso es doble. Primero, la determinación del SMI no sólo afectaría a unos 900.000 trabajadores de media que se calculan que dependían de este “salario” año tras año, pues también suponía el indicador del 75% del SMI de la masa salarial de la que dependía los desempleados que cobraban el subsidio⁸¹. Analizar su fijación por parte del Gobierno, constituye un indicador meridianamente fiable de la “voluntad política” del mismo a la hora de determinar el salario de subsistencia básico⁸².

El contexto ya se ha descrito. La transición de un desempleo/paro coyuntural a uno de carácter estructural centrado en tres grupos con potencial riesgo de exclusión social⁸³. A lo que en el tiempo se sumaría otra serie de novedosos procesos a nivel histórico: la sustitución de fijos por temporales; el incremento y consolidación de la “cultura de la temporalidad”; y, la definitiva consolidación del fenómeno del paro de larga duración. Además de las consecuencias sobre la tasa de cobertura de los desempleados o de la apertura del abanico salarial –aspectos que se ampliarán en sucesivas páginas– nos encontramos con un apartado clave, en donde también se contrastan los estrechos márgenes del modelo económico por el que optaron los sucesivos gobiernos de esta época.

Como matizó el propio Jordi Roca se evidenció aquí los estrechos límites de la “voluntad política del Gobierno” pero también la manifiesta incapacidad “de los sindicatos de obtener mejoras en este terreno”⁸⁴. Resumiendo, a pesar del incremento sostenido que muestra

⁸⁰ Véase lo apuntado en el Capítulo 6, *nota* 272. Y por lo demás referencias centrales en torno a esta cuestión –a sumarse a las empleadas en páginas anteriores y posteriores– mayoritariamente desde una perspectiva jurídica antes que económica en: GARCÍA-ERROTE ESCARTÍN, Ignacio, “El salario mínimo interprofesional” en VILLA, Luis Enrique de la (coord.), *Estudios sobre el salario*, Madrid, ACARL, 1993, pp. 303-362; CARDENAL CARRO, Miguel, “La «racionalización» y aumento de cuantía del salario mínimo interprofesional”, *Aranzadi Social*, nº 5, (2004), pp. 109-122; GETE CASTRILLO, Pedro, “Convenio aplicable y Salario Mínimo Interprofesional”, *Relaciones Laborales*, nº 2, (1996), pp. 1336-1338. Y desde una perspectiva comparada: SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente y PÉREZ CAMPOS, Ana Isabel, *SMI e IPREM*, Navarra, Thomson Aranzadi, 2007.

⁸¹ Tal y como remarcaba otro informe del Instituto Sindical de Estudios en 1989: «Los asalariados no han mejorado su poder adquisitivo global en estos diez años, en tanto que el salario mínimo interprofesional, fijado por el Gobierno, que afecta a los colectivos más desfavorecidos (900.000 de forma directa y cuatro millones indirectamente), ha perdido [varios] puntos de poder adquisitivo desde 1980 a 1987». AHFFLC, INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS, “Algunas notas introductorias al debate sobre el giro social”, Madrid, enero de 1989, sig. AI-174-03. Documento adjunto dentro de la UGT, Secretaría Confederal de Formación, “U.G.T. ante la política económica y social”, febrero de 1989.

⁸² Puede llegar a sorprender que quien fuera Ministro de Trabajo llegará a afirmar lo siguiente: «El salario mínimo interprofesional tiene una escasa relevancia en el mercado de trabajo, en la medida en la que es muy limitado el colectivo de trabajadores que tiene fijada su retribución de acuerdo con el SMI». MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-igualdad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, pp. 202-203.

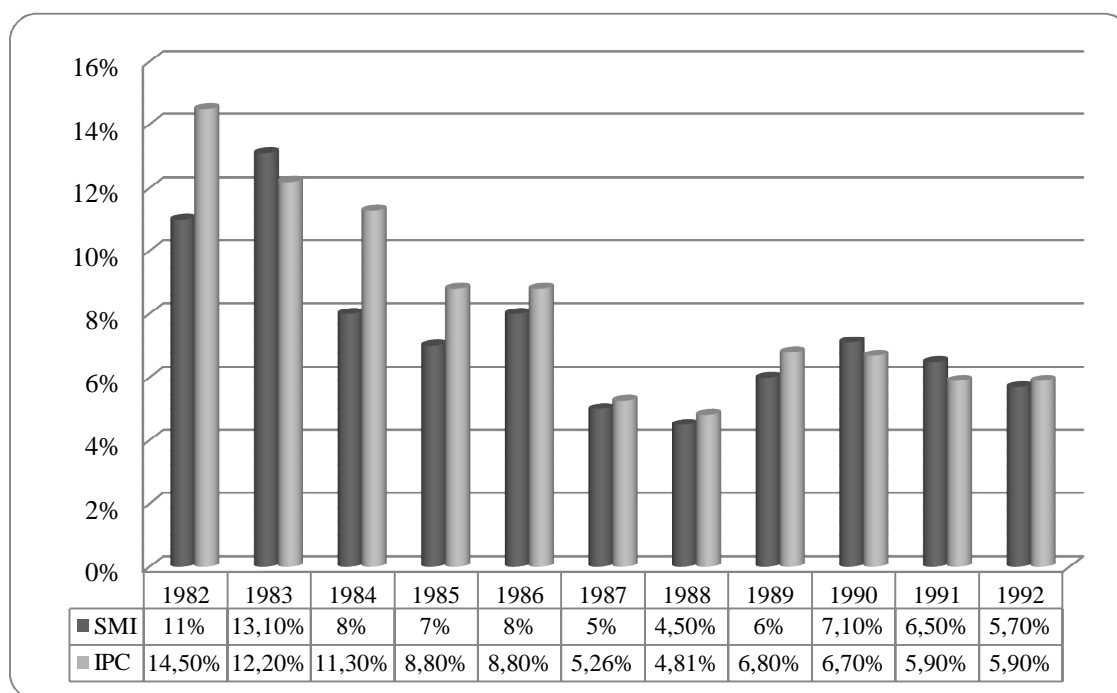
⁸³ En perspectiva temporal véase el informe, ANISI, David [et al.], *Análisis económico de...*, *op.cit.*.

⁸⁴ ROCA, Jordi, “La distribución de la renta entre las clases sociales” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 632. Aunque considerado por parte de las fuerzas sindicales un objetivo prioritario, en verdad, durante buena parte de la década de los años ochenta tendría un tratamiento secundario dentro de la negociación colectiva. Tan sólo, a partir de la reclamación del pago de la ‘deuda social’ dicha reivindicación cobraría fuerza, denunciándose, en adelante, como «el agravamiento de la situación de los trabajadores sujetos a Salario Mínimo Interprofesional, en cuya revalorización se ha violado flagrantemente el Estatuto de los Trabajadores». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría General, “Informe de Gestión que presenta la CEC al XXXV Congreso Confederal”, Madrid, 1990, sig. 0067-001, p. 17. Sobre este último aspecto consúltese el brillante trabajo de, VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Salario mínimo interprofesional e igualdad de remuneración por razón de sexo (art. 27 y 28)”, *Civitas*, vol. I, nº 100, (2000), pp. 631-654, dentro del dossier monográfico, *El Estatuto de los*

la evolución del SMI, el mismo a duras penas se mantuvo por encima del nivel de 1982. Si tenemos presente tanto la evolución del Salario Mínimo Interprofesional estableciendo un Índice del SMI a partir de 1982 con valor cero y realizando la misma operación en la concreción de un índice del IPC para la misma; resulta así que el SMI real tan sólo aumentó tres puntos hasta 1992 desde esta perspectiva comparativa, estableciéndose para nuestra fecha extrema final en 103,4 puntos. Desde 1983 hasta 1989 el mismo índice se mantendrá en valores del 99,8 para 1983, 98,5 para 1986 o 96,8 para 1989, cuando a partir de entonces el Gobierno en su *apuesta* por el pago de la “deuda social” incrementará sustancialmente dichas partidas. Con todo este incremento en este tiempo se constata, al mismo tiempo, “el progresivo alejamiento en nuestro país del salario mínimo interprofesional del salario medio, diferencia que aumenta en más de cuatro puntos desde 1982 a 1991”⁸⁵.

Un asunto también que puede observarse desde otra perspectiva: para el uno de enero de 1982 el salario mínimo interprofesional era de 948 pesetas al día y al mes 28.440, pero es que una década después, las 1.876 pesetas diarias y 56.280 pesetas mensuales, seguían constituyendo un salario que a duras penas permitía la subsistencia, teniendo en cuenta el incremento de la inflación y el crecimiento económico del país⁸⁶ [véase en el “anexo” la *Tabla 54*].

Gráfico 11. Tasa de crecimiento anual del SMI y el IPC, 1982-1992



Trabajadores. Veinte años después. Véase aquí también el trabajo, CEBRIÁN, Inmaculada, *El salario mínimo y sus efectos sobre el mercado de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010. Y desde una perspectiva histórica, VILAR RODRÍGUEZ, Margarita, *Los salarios del miedo: mercado de trabajo y crecimiento económica en España durante el franquismo*, Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo, 2009; y concretamente: SOTO CARMONA, Álvaro, *El trabajo en España: de la crisis del sistema gremial a la flexibilización*, Madrid, Entrelíneas, 2003.

⁸⁵ MUÑOZ DE BUSTILLO, Rafael, “Salarios, desempleo y calidad de empleo” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 192. Para una comparación internacional remitimos a DOLADO, Juan [et al.], “The economic Impact of Minimum Wages in Europe”, *Economic Policy*, n° 23, (1996), pp. 319-372. Asimismo la referencia central sobre este asunto la sigue constituyendo el libro de, CARD, David y KRUEGER, Alan B., *Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wages*, Princeton NJ, Princeton University Press, 1994.

⁸⁶ Compárese tales cifras con las apuntadas en la *Tabla 50* y en la *Tabla 51*.

Fuente: INE, MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.28 y elaboración propia.

La estrategia socialista de contención salarial va a coincidir, además, con la introducción y aplicación de las nuevas técnicas de gestión características de la denominada empresa “post-industrial”⁸⁷. Unas técnicas destinadas a mejorar la productividad, y, por tanto, la competitividad en un mercado cada vez más internacionalizado. Ahora bien, la dirección de las mismas tendrá en la práctica un principal fin: la reducción de los costes laborales.

Confluyen, por tanto, dos lógicas que dentro del paradigma clásico van a extender la *sospecha* –cuando no a “culpabilizar” directamente– sobre la cuestión salarial. Los argumentos básicos difieren, por un lado la inflación, y por otro la merma de la capacidad competitiva, pero no así el objetivo común. Desde el mundo de la empresa se tenderá de forma prioritaria, cuando no exclusiva, a una moderación de los costes salariales de cara a abaratar el producto final, por la vía de incrementar su plusvalía global⁸⁸. Una lectura desde los presupuestos clásicos convertida en “principio de realidad” en estos años⁸⁹.

Antes de avanzar en la cuestión de la competitividad y de la productividad del mercado nacional, no se puede desligar dichas cuestiones de la configuración de la propia estructura productiva, que surge tras el proceso de reestructuración del modelo capitalista español en tiempos democráticos. Vaya, por delante, que el proyecto modernizador socialista no conllevó, en términos generales, un cambio radical o de fondo sobre los principales motores de la economía procedentes de la dictadura. A lo sumo cabe hablar de aceleración y/o intensificación de procesos que se encontraban en marcha en épocas anteriores. El cuadro resultante de las fortalezas, debilidades e incapacidades de nuestro mercado nacional, será al final de la época socialista bastante similar al heredado del franquismo.

⁸⁷ Junto con lo apuntado en el Capítulo 2, *nota 104, nota 105, nota 107, nota 109*, entre otras, en relación a las diferentes interpretaciones en juego, así como en lo referido a la bibliografía básica, véanse aquí también: SCASE, Richard, *Industrial societies: crisis and división in Western capitalism and state socialism*, London, U. Hymman, 1989; ALLEN, John J., “¿Hacia una economía postindustrial?”, *Zona Abierta*, nº 65-66, (1993), pp. 47-102, dentro del dossier monográfico, *La economía de los servicios en la sociedad postindustrial*; SÁNCHEZ-JIMÉNEZ, José, *La sociedad postindustrial*, Madrid, Información e Historia, 1995; KUMAR, Krishan, *From post-industrial to post-modern society: new theories of the contemporary world*, Oxford, B. Blackwell, 1995; BERZOZA MARTÍNEZ, Raúl, *Hacia el año 2000: ¿qué nos espera en el siglo XXI?* Bilbao, Desclée de Brouwer, 1998. Desde una perspectiva crítica nos remitimos al trabajo de, BLOCK, Fred L., *Postindustrial possibilities: A critique of Economic Discourse*, Berkeley, University of California Press, 1990.

⁸⁸ Consúltase el aclaratorio trabajo de, LÓPEZ GANDÍA, Juan, “La permanente reivindicación de rebaja de cotizaciones y la financiación de la Seguridad Social”, *Revista de Derecho Social*, nº 45, (2009), pp. 233-240.

⁸⁹ Una lectura clásica que obviaba fundamentos básicos de la economía moderna: «El crecimiento de la productividad no es una variable clave de la política económica, porque se produce normalmente. Basta con establecer el marco que garantice la acumulación capitalista. Pero, en una situación de crisis económica, las cosas son muy diferentes. Entonces, la acumulación se reduce como consecuencia del descenso de la tasa de beneficio, y la producción se ralentiza y tiende a estancarse. En estas condiciones, el aumento de la productividad sólo es posible con cargo al nivel de empleo. Exige actuar sobre la organización del trabajo, favorecer la introducción de inversiones racionalizadoras de la producción, eliminar la capacidad productiva ociosa, etc. En suma, ya que no es posible aumentar la productividad haciendo que lo haga la producción, se trata de reducir el nivel de empleo haciendo que éste sea más productivo». ALBARRACÍN, Jesús, “La extracción del excedente y el proceso de acumulación” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, pp. 326. En términos más concretos sobre el concepto de productividad, NAREDO, José Manuel, *La economía en...*, *op.cit.*.

En lo básico, durante la “década del cambio” se consolidarán tres grandes procesos interrelacionados⁹⁰: a) la acelerada y definitiva pérdida de la importancia del sector primario en la Contabilidad Nacional, al reducir su participación en el PIB a menos de 5 puntos en el cómputo total (4,42% en 1992)⁹¹; b) las dificultades por las que atraviesa el antes poderoso sector secundario, que a pesar de incrementar su participación en el PIB durante los años de crecimiento económico, terminaría un punto por debajo que en 1982; c) y, finalmente, se asiste al despegue definitivo del sector servicios que no sólo aumenta cuatro puntos su peso en el PIB en este tiempo, sino es que además concentra cerca del 60% de la población asalariada ocupada⁹². [consúltense en el “anexo” la *Tabla 55*, la *Tabla 56*, la *Tabla 57*, la *Tabla 58*, así como el *Gráfico 12*, el *Gráfico 13* y el *Gráfico 14*].

⁹⁰ Para una visión general, GARRIDO, Luis J., *Prospectiva de las ocupaciones y la formación en la España de los noventa*, Madrid, Instituto de Estudios y Análisis Económicos / Ministerio de Economía y Hacienda, 1991. Todo ello junto, primero, con lo expuesto en, MIGUEL, Jesús M. de, *Estructura y cambio...*, *op.cit.*; y más concretamente los informes cuarto y quinto de la Fundación FOESSA: MURILLO FERROL, Francisco (dir.), *Informe sociológico sobre...*, *op.cit.*; y, JUÁREZ, Miguel (dir.), *V Informe Sociológico...*, *op.cit.*, de forma respectiva.

⁹¹ Sobre este acelerado proceso remitimos a, SUMPSI, José M., *Modernización y cambio estructural en la agricultura española*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1994; y, BARCELÓ, Luis Vicente [et al.], *Organización económica de la agricultura española. Adaptación de la agricultura española a la normativa de la UE*, Valencia, Fundación Alfonso Martín Escudero, 1995; y en términos más concretos a una de las obras de referencia para todo este periodo: NAREDO, José Manuel, *La evolución de la agricultura en España (1940-1990)*, Granada, Universidad de Granada, 1996.

⁹² De hecho, las tasas de ocupación junto con las del Valor Añadido Bruto (VAB) en relación al sector servicios no han dejado de crecer de manera espectacular desde 1970. Un proceso prácticamente generalizado en la zona OCDE. Veamos. En aquella misma fecha el sector servicios suponía el 37,3% del empleo total; en 1980 la cifra ascendía al 47,5% y en al año de la salida de los gobierno socialistas, 1996, en el sector servicios trabaja el 62,1% del total ocupados en el país. Si nos detenemos en los datos para estas dos décadas en relación al número de trabajadores en cada sector obtenemos los siguientes datos: la agricultura perdería 1.507.000 empleos, la industria 849.200 empleos, y la construcción creció en apenas 46.800 empleos, mientras que en el sector servicios trabajarían 2.7705.926 de trabajadores más. De todo el empleo creado, los denominados ‘servicios a empresas’ se constituiría en la actividad que mayor crecimiento experimentó con 6,8 puntos porcentuales. *Ibidem*, pp. 194-195. Datos extraídos de, CUADRADO ROURA, Juan Ramón, “Sector servicios: Una visión de conjunto” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, *op.cit.*, p. 179. El corpus bibliográfico sobre esta peculiar transición es enormemente extenso. Entre otras obras de referencia: SAÉZ, Felipe (coord.), *Los servicios en España: situación y tendencias*, Madrid, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, 1993; RÍO, Clemente del, *La evolución de los servicios en España*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1992; GUTIÉRREZ, Pablo Carlos, *El crecimiento de los servicios. Causas, repercusiones y políticas*, Madrid, Alianza, 1993. A nivel internacional, y para estos años, GERSHUNY, Jonathan I. y MILES, Ian D., *La nueva economía de servicios. La transformación del empleo en las sociedades industriales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988. Por último, consúltense varios dossier monográficos publicados a lo largo de estos últimos años. Entre otros, el de la *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, nº 3, (1994), dedicado a *La necesaria liberalización de los servicios en España* con algunos trabajos de interés como los de, BUIGES, Pierre, “Los mercados de los servicios en la economía de la Unión Europea” (pp. 253-291); o, FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Miguel Ángel, “La liberalización de los servicios en España” (pp. 327-382); el dossier de *Papeles de Economía Española*, nº 42, (1990), con textos como el de, CUADRADO ROURA, Juan Ramón, “La expansión de los servicios en el contexto del cambio estructural de la economía española” (pp. 98-122); o, BARÓ, Ezequiel, “Cambios en la interdependencia entre sectores industriales y terciarios” (pp. 192-201); el dossier monográfico de *Economía Industrial*, nº 313, (1997), con trabajos como el de, RUBALCABA BERMEJO, Luis, “Servicios a empresas: marco analítico, magnitud y evolución reciente en Europa” (pp. 21-43); o, BONAMY, Joël y BARCET, Andrés, “Servicios a empresas y eficacia del sistema productivo: de la transacción a la valoración” (pp. 59-66); y por último el publicado por *Zona Abierta*, nº 65-66, (1993) con entre otros análisis como los firmados por, JAY ALLEN, John, “Hacia una economía posindustrial?” (pp. 45-102); o el de, OFFE, Claus, “El crecimiento del sector servicios” (pp. 141-16). Y finalmente consúltense el informe para la Comisión of the European Communities de, OCHEL, Wolfgang y

Igualmente, el periodo de los gobiernos socialistas es ampliamente recordado por el proceso de *reconversión industrial*⁹³. Es así por múltiples elementos que sobrepasan lo estrictamente económico al haber afectado a numerosas regiones del país. Pero también por algo menos material como afirmó el presidente del Gobierno: el “posible elemento simbólico” de que fuera un ejecutivo socialista quien llevará a cabo tal operación⁹⁴.

La voluntad y la decisión de los socialistas en este campo serían unívocas. Un *arroyo* donde pesaron sobremanera las tesis de Boyer⁹⁵. Aunque no puede atribuirse a la ligera a los propios dirigentes todas sus consecuencias –tanto *positivas* como *negativas*⁹⁶– lo cierto es que se procede en estos años al impulso definitivo de la llamada “desindustrialización” industrial, como proceso que desde el mismo Gobierno se asocia a la *modernidad por venir*⁹⁷. Considerado

WEGNER, Manfred, *Service Economies in Europe: Opportunities for Growth*, London, Westview Press, 1987.

⁹³ Junto con lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 336* entre otras, véase el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)” y en relación su puesta en marcha y desarrollo el Capítulo “11. En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero/-febrero 1984-julio 1984)”.

⁹⁴ Felipe González en declaraciones a IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 825. Y añadía: «Nos tocó hacerla a nosotros, era nuestra responsabilidad. Y empezamos la pelea con dos o tres decisiones que, para cualquier Gobierno eran dramáticas [...]. La reconversión había que hacerla porque el país lo necesitaba. No se trataba, como se quejaban algunos, de nos tocar hacer el trabajo sucio que no había querido afrontar la derecha [...]. Por tanto, la reconversión tenía que ser nuestro trabajo, y no era un trabajo fácil». *Ibidem*, pp. 826 y 829, respectivamente. Sobre la *colectiva responsabilidad* al respecto, siempre citada al principio y/o al final de cada *discurso* en el terreno de lo económico, los comentarios de Miren Etxezarreta han de ser tenidos en cuenta: «Se ha querido adscribir este continuidad a la no existencia de otra política económica posible [...] y al sentido de la ‘responsabilidad’ del gobierno socialista, dispuesto a renunciar a sus propios principios en aras de la necesaria salida a la crisis. Pero parece más realista e interesante observar la incidencia que han tenido otros elementos. Ya se señaló que esta política económica era la sostenida por los poderes fácticos de la economía mundial y las instituciones internacionales, así como la preocupación del nuevo gobierno por mostrar su ‘seriedad’ ante ellos. Es, asimismo, la política económica preconizada por los grupos dominantes en España, por lo que su aceptación evitó el enfrentamiento con éstos». ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en *id.* (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, pp. 49-50.

⁹⁵ «En cualquier caso, era evidente que había que hacer una reconversión. Lo que discutíamos era cómo hacerla. Al final, triunfó la tesis de Miguel Boyer que favorecía la suspensión de contratos y perdió el Ministro de Industria». Joaquín Almunia en declaraciones a IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, pp. 160-161.

⁹⁶ Con todo hay quien ha visto en este tipo de procesos no sólo «tendencias claras de igualación social», sino que han rechazado las *habituales* afirmaciones ‘catastrofistas’, eso sí, sin aportar datos concluyentes. Nos referimos a las hipótesis manejadas desde hace años por Jesús de Miguel quien diría lo siguiente: «El coste pues de la desindustrialización [...] se suele absorber por las propias zonas industriales. Eso implica también menos sufrimiento, coste y menor separación de las personas de su entorno social. Hay que tener en cuenta que el proceso de terciarización de la economía supone la creación de nuevos puestos de trabajo que permiten la incorporación de la mujer al empleo fuera del hogar [...]. Este modelo nuevo de desarrollo incluye tendencias claras de igualación social». MIGUEL, Jesús de, *Estructura y cambio...*, *op.cit.*, p. 289. Probablemente al autor no leería en la prensa un informe de Comisiones Obreras que hablaba de cómo habían aumentando un 37% los suicidios en zonas de reconversión industrial y como se habían incrementado los cuadros clínicos de estrés a cifras no conocidas. Datos extraídos de, PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en *id.* y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, *op.cit.*, p. 45, *nota 29*. Y de cara al proceso de terciarización a largo plazo, CALVO ORTEGA, Francisco, “El postfordismo en la organización del territorio”, *Sistema*, n° 187, (2005), pp. 35-52.

⁹⁷ Una propuesta que viene a comulgar más con la visión conservadora de, PIORE, Michael y SABEL, Charles, F., *La segunda ruptura...*, *op.cit.*, así como con la línea de interpretación defendida en su día por, BELL, Daniel, *El advenimiento de...*, *op.cit.*. Asimismo véanse, COHEN, Daniel, *Tres*

uno de los retos fundamentales de la estrategia de la modernización, y partiendo de una estructura industrial anquilosada, aquellas reformas irían mucho más lejos de una simple “reconversión”⁹⁸.

Si la *necesidad* de sanear este sector, y concretamente las empresas que componían el Grupo INI, era una cuestión que, en ningún caso, se podía poner en cuestión por parte de todos los implicados; otro asunto diferente fueron tanto sus consecuencias a corto y medio plazo, así como los procesos directos o indirectos que conllevaría dicha operación. Todo ello con una premisa inicial a tener muy presente: “[E]l primer gobierno del PSOE no llevó a cabo ningún intento serio de concertación ni con las centrales sindicales ni con el resto de las fuerzas políticas parlamentarias”⁹⁹.

Rechazadas frontalmente por parte de los dirigentes y técnicos socialistas cualquier tipo de política de nacionalizaciones de sectores industriales en “crisis”, así como las políticas anticíclicas basadas en potenciar el sector público, se pondría punto y final a la instrumentalización político-económica que llevarían a cabo los últimos gobiernos de la dictadura así como los de la UCD sobre el INI¹⁰⁰. Una estrategia que se puede extender en el tiempo desde 1970 a 1982, y que estaría centrada en “auxiliar” —o si se prefiere se puede hablar directamente de *nacionalizar y/o de socialización de pérdidas del capital privado*— las empresas privadas en situación de quiebra con un doble fin *teórico*, que no por ello dejaba de esconder el papel subsidiario del Estado: primero, salvar el mayor número de empleos y de empresas privadas en una situación de crisis económica y de destrucción neta de puestos de trabajo; y segundo, evitar por esta vía el empeoramiento de una por sí débil situación político-social agravada durante la transición post-franquista¹⁰¹.

Su resultado más directo sería la incorporación al Grupo INI de más de 25 empresas —entre otras, Astano, ENSA, SEAT, Astilleros Españoles...— junto 95.000 trabajadores y unas

lecciones sobre..., *op.cit.*; y, SANCHIS, Enric, *Trabajo y paro...*, *op.cit.*. Y, por lo demás, remitimos a la nota 87.

⁹⁸ Consúltense los datos ofrecidos por, BUESA, Mikel y MOLERO, José, *Estructura Industrial de España*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1988. A complementar con el trabajo de un año después de, SEGURA, Julio [et al.], *La industria española en la crisis, 1978-1984*, Madrid, Alianza, 1989.

⁹⁹ MARÍN ARCE, José M^a, “Los socialistas en...”, *op.cit.*, p. 54. Con razón posteriormente Felipe González señalaría que el propio Carlos Solchaga «fue, en general, poco sensible al estado de ánimo de los ciudadanos». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 832. Véase aquí también el Capítulo “11. En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero/febrero 1984-julio 1984)”.

¹⁰⁰ Tan sólo sería a partir de la aprobación por parte del gobierno de UCD del Decreto-Ley, 9/1981, de 5 de junio, *sobre medidas para la reconversión industrial* cuando realmente se pondrían las bases para una reordenación del sector industrial. Una normativa que, en breve, estaría acompañada de otras tantas generales o específicas —a destacar, Orden, de 16 de junio de 1981, *por la que se desarrolla un sistema de ayudas por jubilaciones anticipadas para trabajadores de Empresas no sujetas a planes de reconversión* [B.O.E. 22 de julio de 1981]—. En su *Exposición de Motivos* ya se dejaba claro desde que situación se partía y hacia donde se encaminaba el citado Decreto-Ley: «La situación de crisis por la que atraviesan sectores básicos de nuestra industria exige un planteamiento específico y la adopción de medidas de reconversión industrial, con el fin de lograr la racionalización de los procesos productivos y su adecuación a las exigencias del desarrollo económico y tecnológico y a las condiciones específicas del mercado [...]. La legislación de la época de crisis económica ha sido normalmente de carácter excepcional, sin abordar de modo expreso y general las situaciones de crisis. Para llenar este vacío legislativo, la presente norma establece las medidas adecuadas para el tratamiento de la crisis; medidas que, por su naturaleza, exigen rango de Ley. Se prevén tres tipos de medidas: fiscales, financieras y laborales». Complementétese lo anterior con la normativa y bibliografía apuntada en el Capítulo 6, *nota* 335, entre otras.

¹⁰¹ Un balance crítico de esta política en, GÓMEZ URANGA, Mikel, “La internacionalización de la industria española: un proceso acelerado” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, pp. 465-500.

enormes pérdidas millonarias¹⁰². El caso más significativo de esta política de “salvamento” de las empresas privadas será la nacionalización de las sociedades mineras –HUNOSA¹⁰³– en una fecha tan temprana como 1970. Todo ello con un coste tremendo, pues tan sólo entre 1981 a 1982 se calcula que en subvenciones se alcanzaría los “100.000 millones de pesetas, además de créditos y avales, sin que ejerciesen ningún efecto sobre la estructura industrial española”¹⁰⁴. Como asimismo recordó Charles Powell “en 1983 el 70% del déficit del grupo INI se debía a las empresas «socializadas» entre 1977 y 1982”¹⁰⁵.

Entre 1974 a 1984 se destruirían 798.495 empleos industriales en todo el país –véase aquí la *Tabla 59* sobre la evolución de la destrucción de empleo en la industria entre 1974 a 1984–¹⁰⁶. Así pues, la situación global a la llegada de los gobiernos socialistas era evidente: un sector público enormemente deficitario –véase la *Tabla 60* sobre el Balance de Situación del Grupo INI– e incapaz de competir en un mercado cada vez más internacionalizado.

Si bien el diagnóstico ofrecía pocas dudas, lo que va a acontecer entre 1984 a 1988/1989 sobrepasa el mero fenómeno de “reconversión”, como ya se ha dejado apuntado¹⁰⁷. Bajo la

¹⁰² «En conjunto, el INI perdió 204.000 millones de pesetas en 1983, de las cuales 131.700 millones procedieron de pérdidas contraídas por las compañías nacionalizadas entre 1971 y 1981. Entretanto, la principal empresa ferroviaria, RENFE, registró un déficit de 221.000 millones de pesetas. En consecuencia, incluso añadiendo empresas muy lucrativas, como Telefónica, el sector público registró pérdidas masivas en 1983». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 170. Sin duda esta política de *socialización de pérdidas* por parte de los Gobiernos de la UCD se convertiría en el principal lastre del INI, como remarcaron Mercedes Cabrera y Fernando del Rey. Pero a su vez y ya en tiempos socialistas este acusado déficit sirvió a su vez de justificación política y económica de cara a privatizar este sector público: «El 70 por ciento del déficit del grupo INI se debía a empresas ‘socializadas’ en los años duros de la crisis económica, entre 1977 y 1982, pero eso no impidió que llovieran sobre el Instituto las más feroces críticas, en las que llevaron la voz cantante quienes lo ligaban a su pasado franquista y descartaban cualquier posible encauzamiento de aquel mamotreto burocratizado e ineficiente». CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, *El poder de...*, *op.cit.*, p. 355. Consúltese, nuevamente, la obra de, NAVARRO, Miquel, *La política de...*, *op.cit.*, así como el trabajo de, PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS, Henar, *Reconversión y reindustrialización en España. Los nuevos dinamismos espaciales*, Valladolid, Secretariado de Publicaciones Universidad, 1993. Por lo demás, véase lo también reflejado en el apartado “6.2.4. El embrujo de la *retórica europeizante*”.

¹⁰³ Una visión general sobre este proceso: SERVÉN, Luis, “La empresa pública en un sector estratégico: HUNOSA”, *Papeles de Economía Española*, nº 38, (1989), pp. 383-389; y en relación a los conflictos obreros-mineros acaecidos en torno a tal sector, GARCÍA PIÑEIRO, Ramón, “El declive de HUNOSA. Resistencia obrera y sindical al ocaso de la minería pública” en PONS, Jerónima, FLORENCIO PUNTAS, Antonio y ARENAS POSADAS, Carlos (eds.), *Trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea*, Sevilla, Mergablum, 2001, pp. 405-418.

¹⁰⁴ AHFPI, PSOE, “El Gobierno ante la crisis económica. Explicación de la política económica e industrial de los socialistas”, Madrid, abril de 1984, Fc 381, p. 5.

¹⁰⁵ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 349. Apuntando líneas más abajo: «Si en 1984 las subvenciones a las empresas estatales deficitarias representan todavía el 3,7% del PIB, en 1987 sólo consumían un 0,7% de la riqueza nacional». *Ibidem*, *nota* 25.

¹⁰⁶ Consúltese asimismo los datos ofrecidos por, JAUMANDREU, Jordi, “El empleo en la industria: destrucción de puestos de trabajo, 1973-1982”, *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 108-128; y en concreto, SEGURA, Julio, “La evolución del empleo en la industria española según la Encuesta Industrial (1978-84)” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, *op.cit.*, vol. III, pp. 439-486.

¹⁰⁷ Así se recogía en el tantas veces citado Documento de Estrategia del PSOE de mil novecientos ochenta y tres: «La idea de la necesidad de proceder a la reconversión de determinados sectores productivos en crisis como mecanismo para impedir la desaparición real de los sectores y empresas afectados, liberando al mismo tiempo considerables cantidades de fondos públicos que pueden ir dirigidos hacia otras inversiones y actividades generadoras de empleo, en el contexto de medidas de promoción industria, es una idea sumida por todos». AHFFLC, PSOE-CEF, “Documento de estrategia”, octubre de 1983, sig. AI-647-08 p. 28.

nueva lógica modernizadora se interrelacionan, por lo menos, otros tres procesos paralelos: el primero, el de la propia *desindustrialización*, pues a partir de la concreción de las líneas maestras expuestas en el *Libro Blanco sobre la Reindustrialización* se asistirá a un verdadero *desmantelamiento* del sector público secundario a través de una profusa normativa¹⁰⁸; segundo, la estrategia de privatización de las empresas públicas del INI o del INH irá cobrando cada vez mayor protagonismo¹⁰⁹; y, tercero, la pretendida especialización industrial conllevará una dualización regional que condenará, en un breve plazo, a territorios enteros a procesos de empobrecimiento económico¹¹⁰.

Sobre el primer punto ha de remarcarse el alto coste económico de tal operación. Tras la aprobación de la Ley 27/1984¹¹¹ y la creación de los Fondos de Promoción de Empleo (FPE), las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR)¹¹² y más tarde las Zonas Industriales en

¹⁰⁸ Véanse desde una perspectiva eminentemente jurídica, RAYÓN SUÁREZ, Enrique (ed.), *Reconversión y reindustrialización: normas legales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985; y más concretamente, MONEREO PÉREZ, José Luis, *Las reconversiones industriales...*, op.cit.. Y asimismo el valioso dossier monográfico de, *Economía Industrial*, nº 232, (1983), dedicado a *Crisis, ajuste y reindustrialización*. Entre otros textos allí presentados –más lo citados en otras partes–: DESDENTADO BONETE, Aurelio y GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio, “Las medidas laborales en la Reconversión Industrial” (pp. 51-64); o ALBENTOSA, Luis, “Las políticas de ajuste y la planificación” (pp. 65-72).

¹⁰⁹ Sobre las características del Instituto Nacional de Hidrocarburos el texto del técnico socialista, FANJUL, Óscar, “El proceso configurador del INH”, *Economía Industrial*, nº 248, (1986), pp. 37-40.

¹¹⁰ Un balance general y a largo plazo en el libro clásico de, NADAL, Jordi y CARRERAS, Albert (eds.), *Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX)*, Barcelona, Ariel, 1990; y también en la obra de, NADAL, Jordi y CATALÁN, Jordi (eds.), *La cara oculta...*, op.cit.. Y asimismo, PÉREZ, Francisco, GOERLICH, Francisco José y MAS, Matilde, *Capitalización y crecimiento en España y sus regiones, 1955-1995*, Bilbao, Fundación BBV, 1995. Todo ello junto con otros tres ‘informes’ y trabajos de fondo de diversa consideración: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Disparidades económico-laborales de las provincias españolas*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1986; LÓPEZ BAZO, Enrique, *Disparidades económicas y homogeneidad en el crecimiento regional: un enfoque basado en la población ocupada (1977-1992)*, Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, 1994; y, FUNDACIÓN FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, *Disparidades económicas regionales*, Madrid, Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social / Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1996. A lo que deben sumarse trabajos del momento: BRU PARRA, Segundo y PASTOR, Vicente J., “Consideraciones en torno al concepto de Política Industrial y su dimensión espacial: el caso español”, *Estudios Territoriales*, nº 22, (1986), pp. 55-68; FERNÁNDEZ GARCÍA, Aladino, “La reconversión industrial en España: impacto regional y transformaciones espaciales”, *Eria*, nº 17, (1988), pp. 191-200. Asimismo entre otros muchos números monográficos de revistas especializadas véase el dedicado por *Información Comercial Española*, nº 645, (1987) al respecto en una fecha clave. Entre otros textos allí contenidos: CASTILLO HERMOSA, Jaime del, “Regiones industrializadas en declive: el caso del Norte de España” (pp. 9-18); así como el promovido por *Economía Industrial*, nº 263-164, (1988). A destacar dos trabajos allí contenidos: AURIOLES MARTÍN, Adolfo Juan y MOCHÓN MORCILLO, Francisco, “La industria andaluza: situación actual y perspectivas” (pp. 17-25); y, OLAVARRI FERNÁNDEZ, Rogelio y GÓMEZ, Pedro, “Estructura industrial de Cantabria” (pp. 89-112. Probablemente el ejemplo más clarificador de todo este proceso sean los efectos de la propia reconversión en la región de Asturias, especialmente bien tratados en los siguientes trabajos: VÁZQUEZ GARCÍA, Juan Antonio y ARIAS, Ángel Manuel, “Asturias: crisis y declive industrial”, *Economía Industrial*, nº 263-164, (1988), pp. 35-49; PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS, Henar, “Reconversión y reestructuración industrial en Asturias”, *Eria*, nº 28, (1992), pp. 151-164; CASTELLS, Manuel (dir.) y VÁZQUEZ, Juan Antonio (coord.), *Estrategias para la reindustrialización de Asturias*, Madrid, Civitas / Principado de Asturias, 1994; GARCÍA BLANCO, José M^a, “Declive económico y políticas regionales: el caso de Asturias”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 83, (1998), pp. 87-119. Véase, por lo demás, lo ya apuntado en el Capítulo 7, nota 27.

¹¹¹ Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre *Reconversión y Reindustrialización*.

¹¹² Aquí véanse: PÉREZ SIMARRO, Ramón y LAFUENTE FÉLEZ, José M^a, “Balance y perspectivas de las ZUR”, *Papeles de Economía Española*, nº 35, (1988), pp. 219-234; y, ESTAVILLO

Declive (ZID)¹¹³, se destinarían en dichos sectores, según la propia UGT, cerca de 2,7 billones de pesetas¹¹⁴. 791 empresas se acogerían a tales planes y 280.000 trabajadores se verían afectados directa o indirectamente. En la *Tabla 61* se puede observar como el número de efectivos del INI pasaría de 219.829 a 151.674 desde 1982 a 1989, es decir, una reducción absoluta directa de 68.155 empleos dentro del propio grupo empresarial público. En las otras *Tablas*, asimismo, se verifica el amplio impacto de la reconversión industrial por Comunidades Autónomas, a partir de las previsiones del PRI y los proyectos aprobados por las Comisiones Gestoras de las ZUR [véanse en el “anexo” la *Tabla 61*, la *Tabla 62*, la *Tabla 63*, la *Tabla 64* y la *Tabla 65*].

En una segunda lectura debe advertirse como “la *industria* no logró restablecer la capacidad impulsora de que había gozado con anterioridad a la crisis y reiteró su sólo mediana contribución al crecimiento económico, retrocediendo en su participación en el VAB”¹¹⁵. A lo que debe agregarse, el desmantelamiento de los principales nodos industriales con el efecto querido o no querido –según se quiera interpretar– de desarmar paulatinamente a los antes poderosas federaciones sindicales de industria¹¹⁶. Lejos de tal aireado “apoyo social” con el que contó tal proceso, el mismo conllevó multitud de conflictos obreros desde su misma puesta en

DORADO, Julio, MONTES GAN, Vicente José y CARRASCO PRADAS, Amparo, “El proceso de localización de la actividad industrial en España: La experiencia de las ZUR”, *Economía Industrial*, nº 309, (1996), pp. 19-26.

¹¹³ Véanse al respecto los aclaratorios cuadros aportados por, FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 158. En concreto el “Cuadro 6. Inversiones en sectores en reconversión” y “Recursos públicos reconversión industrial”. E igualmente, PÉREZ BARBERO, P., “Problemática de los principales costes de reconversión industrial”, *Impuestos*, nº 2, (1987), pp. 149-154. Un ejemplo práctico de las consecuencias reales de este proceso en, UGT-CEC, *Acuerdos para la reconversión naval de grandes astilleros*, Madrid?, UGT-CEC-Metal, 1984.

¹¹⁴ MARÍN ARCE, José M^a, “Los socialistas en...”, op.cit., p. 56. El autor toma dichas cifras de un informe de la UGT-Sector Metal, titulado: “La reconversión industrial en España”, Madrid, julio de 1991. Miguel Boyer ofrece, por el contrario, cifras sensiblemente más bajas: «El coste de la reconversión industrial entre 1984 y 1989 puede estimarse en un billón de pesetas y la inversión realizada en esos sectores, entre 1984 y 1989, en 650.000 millones». BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, op.cit., p. 93. Consúltense también los datos ofrecidos en, INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, *Actuación del crédito oficial en los procesos de reconversión industrial y reindustrialización (1964-1985)*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Instituto de Crédito Oficial, 1986.

¹¹⁵ BUESA, Mikel y MOLERO, José, “La industria: reorganización y competitividad” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., p. 155. Véase en este mismo trabajo el “Cuadro 1. Participación en el VAB, tasas y contribución de los sectores al crecimiento económico, 1964-1996” (p. 154) a partir de los datos del INE. Al respecto, resultan enormemente ilustrativas las palabras de Carlos Berzosa: «De este modo, la reconversión industrial, cuya necesidad nadie pone en duda, se sustenta en una mera política de saneamiento financiero y no es una estrategia industrial bien diseñada». BERZOSA, Carlos, “La política económica del PSOE. Condicionantes y presupuestos” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., p. 74. Y también el ilustrativo trabajo de, HERRERO, José Luis y ECHEBARRÍA, Goio, “La evolución de la economía española durante el período 1940-1988 a partir de un indicador de la tasa de beneficio del sector industrial”, *Información Comercial Española*, nº 665, (1989), pp. 9-24. Así como los datos ofrecidos por, GORDO, Esther y L'HOTELLERIE, Pilar, “La competitividad de la industria española en una perspectiva macroeconómica”, *Banco de España. Boletín Económico*, octubre de 1993, pp. 43-52.

¹¹⁶ Junto con el libro ya citado de, MARÍN ARCE, José M^a, *Los sindicatos y la...*, op.cit., véase lo apuntado por, RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El gobierno imposible...*, op.cit., pp. 44-ss. En esta última línea véase, PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, op.cit., pp. 55-ss.

marcha¹¹⁷. Pues como recordaría Charles Powell: “[S]uscitó el rechazo casi unánime de los directamente implicados, así como el de muchos habitantes de las poblaciones más afectadas por el cierre de empresas. De ahí las numerosas huelgas, manifestaciones y marchas de solidaridad que tuvieron lugar en 1983-1984”¹¹⁸. La “Marcha Negra” protagonizada por los mineros de la Minero Siderurgia de Ponferrada en 1992 constituiría, de hecho, uno de los últimos grandes episodios de lucha para frenar un proceso de cierre y desmantelamiento de una industria de la que dependían, directa o indirectamente, miles de familias en una de las tradicionales cuencas mineras del país¹¹⁹. Antes, desde Sagunto pasando por Vigo y terminando por Bilbao, se multiplicarían los conflictos obreros a la *defensiva* [véase aquí también en el “anexo” la *Tabla 66*].

Pronto se verificarán otras consecuencias de este proceso. A saber, el precio de la especialización de la estructura productiva en función de la liberalización de la economía¹²⁰. Se va a renunciar, asimismo, a establecer una política industrial global sostenida en el tiempo. Según Carlos Rodríguez Braun, conocido militante por las causas liberales, se atribuyó en su día “a un sucesor de Solchaga en la cartera de Industria, su «amigo» Claudio Aranzadi [y Ministro de Industria], la expresión «la mejor política industrial es la que no existe»”¹²¹.

Este proceso conducirá, a su vez, a la generación de una estructura productiva dual entre sectores dinámicos y otro gran sector compuesto básicamente por empresas pequeñas y medianas –la conocida empresa familiar tan típica en el caso español¹²²– destinada a satisfacer necesidades de primer orden y sujeta más que ninguna a los cambios del ciclo económico. De la misma forma, lo que no explican las estadísticas es el ya advertido proceso de dualización regional, que se produce en estos años, pues mientras que las regiones que albergaban las industrias de la Siderurgia, Minería, Construcción Naval, Bienes de Equipo o Defensa van a

¹¹⁷ FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 156. Los datos que proporciona el propio autor son demoledores teniendo en cuenta la situación de crisis económica. Tanto la creación de los FPE como de las ZUR y más tarde de las ZID conllevaron un alto gasto presupuestario. Por ejemplo, las inversiones en sectores de reconversión hasta el año 1991 generarían un coste de 661.428 millones de ptas. y asimismo los recursos públicos destinados a la reconversión industrial a raíz de la Ley 27/1984 motivaron que de los presupuestos se destinarán 2.035.442 millones de ptas. *Ibidem*, pp. 157-ss. Véase al respecto también los amplios y completos cuadros estadísticos ofrecidos en, AHFPI, PSOE, Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, “La política económica de los socialistas: balance de un ajuste solidario”, Madrid, 1986, sig. B 3482, pp. 36-ss.

¹¹⁸ POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 343.

¹¹⁹ Sobre su desarrollo y repercusiones, VALERIO, Julián, “Objetivo: Hacerse oír en Madrid. Los mineros se desplazan a pie hasta la capital para protestar contra la reducción de empleos” en LAVIANA, Juan Carlos (ed.), *El camino de la Libertad (1978-2008). La democracia año a año*, XXX vols., Madrid, Unidad Editorial, 2008, vol. XII, 1992. *España aprovecha para dar el gran salto*, pp. 60-67. Muy pocos conflictos llegarían a tener ya en los años noventa tales repercusiones en la capital de la nación, a excepción del conocido como el “Campamento de la Esperanza” de los trabajadores de SINTEL durante el año 2001 también afectados por un proceso de privatización. Véase, BLANCO JIMÉNEZ, Carlos, *SINTEL, el callejero de la esperanza: la esperanza está en la calle*, Madrid, C. Blanco, 2002.

¹²⁰ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 53. En esta misma línea, véase, CASTAÑER, Xavier, “La política industrial. Ajustes, nuevas políticas horizontales y privatización: 1975-1996” en GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), *Políticas públicas en...*, *op.cit.*, pp. 79-112.

¹²¹ RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “Carlos Solchaga Catalán” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, *op.cit.*, p. 233. Señalando a continuación: «A tenor de lo que ha sido en la práctica la política industrial en España, es difícil no respaldar el apotegma». *Ibidem*.

¹²² Para sus características, CASADO, Fernando, “La empresa familiar en España”, *Economistas*, vol. XV, nº 73, (1997), pp. 82-85. Por lo demás, véase lo apuntado en la *nota 300*.

verse gravemente afectadas iniciándose acelerados procesos de despoblamiento industrial¹²³; los nuevos nodos industriales basados, en lo básico en el sector servicios, el turismo y las empresas punteras en tecnología, se van a concentrar en las zonas de Madrid, Catalunya, Euskadi o en la zona del Valle del Ebro¹²⁴.

Así se aplicó sin mayores dilaciones políticas liberales en este campo. Eso sí denominadas de “saneamiento”, que implicaron, en suma, la renuncia a construir un sector público fuerte y con posibilidades de competir en un marco a escala internacional. En apenas cinco años, 1984-1989, finalizó tal operación.

Mientras tanto, y en paralelo, se iniciaría un ingente proceso de privatización de las empresas públicas¹²⁵. Un programa que a tenor de lo dicho por los propios socialistas también tendría un “carácter progresista” –como si las privatizaciones fueran *progresistas* o *conservadoras*–¹²⁶. De hecho, más allá de discursos políticamente correctos, la

¹²³ De muy diferente opinión serían los socialistas: «La acumulación del capital, que había disminuido notablemente en los años de la crisis –impidiendo ganancias de productividad generadoras de más actividad y empleo– en el cuatrienio de la recuperación se ha distribuido por todo el conjunto productivo. La inversión en bienes de equipo ha sido la que ha crecido con más fuerza en este período. No obstante, en el resto de la industria también se ha producido una reacción que ha permitido que en estos momentos tengamos una estructura industrial menos sesgada hacia unos determinados tipos de bienes o de sectores y por el contrario que el sector secundario esté hoy más vertebrado en sus grandes componentes». AHFPI, PSOE-CE, “Memoria Política y de Gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso. Madrid 9-11 Nov. 1990”, Madrid, noviembre de 1990, sig. Fc 912, p. 21.

¹²⁴ COLECTIVO IOE, “Características de la desigualdad en el Estado Español” en *La sociedad de...*, *op.cit.*, p. 27. Véase, en concreto, el dossier monográfico de *Revista de Estudios Regionales*, nº 22, (1988), dedicado a *XIV Reunión de Estudios Regionales* con trabajos de la importancia como los de, GONZÁLEZ MORENO, Miguel y CUADRARO ROURA, Juan Ramón, “Incidencia de las nuevas tecnologías en la organización y localización de los servicios de empresas” (pp. 29-68); o el de, GÓMEZ MUÑOZ, Ricardo, “Nuevas tipologías y modelos de localización industrial en España surgidos tras la crisis” (pp. 83-112). Consúltense procesos similares a escala internacional en, ALBURQUERQUE, MATTOS, Carlos A. de y JORDÁN, Ricardo (eds.), *Revolución tecnológica y reestructuración productiva: Impactos y desafíos territoriales*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1993. Y unos años antes el libro básico de, GERSHUNY, Jonathan I. y MILES, Ian D., *La nueva economía de servicios: la transformación del empleo en las sociedades industriales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988 [1983].

¹²⁵ Entre la sobresaliente bibliografía mayoritariamente “pro-privatización” consúltense: CUERVO, Álvaro, *La privatización de la empresa pública*, Madrid, Encuentro, 1997; CANO SOLER, Diego, *Políticas de privatización: aproximación teórica. Experiencias prácticas y propuesta para España*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998; TORRES, Lourdes y PINA, Vicente (coords.), *Privatización de empresas y descentralización de servicios públicos*, Madrid, AECA, 1998; MELLE HERNÁNDEZ, Mónica, “Algunos resultados efectivos de las privatizaciones en España: una primera aproximación”, *Economía Industrial*, nº 330, (1999), pp. 140-158; TRIGO PORTELA, Joaquín, *Veinte años de privatizaciones en España*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2004; y finalmente, ARIÑO ORTIZ, Gaspar, *Empresa pública, empresa privada, empresa de interés general: lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender*, Navarra, Thomson Aranzadi, 2007.

¹²⁶ «Sin embargo, tal privatización se hizo de ‘modo conservador’, sino utilizando estos procesos para situar a las empresas afectadas en grupos nacionales, preferentemente, o internacionales que garantizaran su viabilidad y su capacidad tecnológica». DORADO, Roberto, “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 67. No deja de resultar cuando menos remarcable que otros autores, dirigentes, técnicos socialistas, hayan omitido frecuentemente el mismo hecho de la privatización de las empresas públicas, a pesar de haberle dedicado al asunto de la reconversión/desindustrialización largas páginas. Por ejemplo, FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en *ibidem*. Igualmente se puede observar tales presupuestos en COMISIÓN PROGRAMA 2000, *La economía española...*, *op.cit.*, y en concreto: “Capítulo IV. Las cuestiones pendientes en el sector industrial”, pp. 57-71. En cualquier caso léase la opinión de destacados cargos de la administración al respecto: DEHESA, Guillermo de la, “Las privatizaciones en España”, *Moneda y Crédito*, nº 196, (1993),

reconversión/desindustrialización “tuvo *poco o nada que ver con el desarrollo de los medios de producción o con la introducción de alta tecnología* [...] y mucho que ver con la *transformaciones sociales de producción*”¹²⁷.

Una política que no había formado en momento alguno parte del *corpus* ideológico y programático del socialismo. Hasta entonces, porque derrotado el paradigma keynesiano representado entonces por la Francia de Mitterrand, las tesis clásicas se volverían a imponer en este terreno, por más que desde el gobierno socialista se hablará de *racionalización* y *competitividad*, y no se pretendiera relacionar esta decidida política con debate ideológico alguno¹²⁸. Un terreno que en el ámbito estrictamente académico ha proporcionado y promocionado no pocas justificaciones en torno a tal operación política. Abonando el terreno político como mediático con tesis en una sola dirección: “[E]ran privatizaciones impuestas por el mercado ante la dificultad de continuar su actividad en condiciones de rentabilidad”¹²⁹.

Es decir, a la hora de explicar esta orientación política, de nuevo, se ha recurrido a dos ideas-fuerzas “clásicas”: por un lado, a las siempre referidas “necesidades” del mercado, y por otro lado, a la idea *sui generis* de la *rentabilidad* de lo público. Así tras la experiencia de Rumasa y la nacionalización de la red de alta tensión, será a partir de 1985 y más concretamente con el inicio de la IV Legislatura, cuando se aceleró este proceso¹³⁰.

Es difícil no observar una expresa voluntad privatizadora por parte de los ejecutivos socialistas –más allá, por tanto, de los escasos y parciales debates surgidos en su seno en torno a esta política¹³¹– en el contexto en que se produjo la mayor parte de estas operaciones. Una coyuntura marcada por la recuperación económica y el saneamiento de muchas de las empresas, que incluso durante mediados de la segunda mitad de la década de los ochenta ofrecían cuentas saneadas.

«En parte ayudada por la estrategia gubernamental de contención de costes y racionalización interna, pero fundamentalmente conducida por el repunte económico de la segunda mitad de la década de los ochenta, la posición financiera de las empresas públicas mejoró sustancialmente [...]. El INI redujo sus pérdidas a 41.000 millones de pesetas para 1987 y, excluyendo las compañías socializadas en la década de los sesenta, obtuvo beneficios por valor de 28.000 millones de pesetas. En 1988 el grupo completo anunció unos beneficios de 31.000 millones de pesetas. De forma similar, el INH multiplicó por diez sus beneficios desde 1983 a 1988 en términos nominales (o siete veces una vez se ajustan los beneficios a la inflación). Como consecuencia, las transferencias y subsidios estatales a empresas públicas comenzaron a descender del 3 por ciento del PIB en 1982 a menos del 2 por ciento a mediados de la década de los ochenta»¹³².

pp. 55-71. Y aquí también las oportunas observaciones de, SUÁREZ-ZULOAGA y GALDIZ, Ignacio, “Los efectos ignorados de algunas privatizaciones. El papel de los grandes grupos y corporaciones”, *El País*, 1 de abril de 1993.

¹²⁷ PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, *op.cit.*, pp. 53-54 [*cursiva* en el texto original].

¹²⁸ Sobre esta cuestión nos remitimos a las notas apuntadas en su día por, id., *La socialdemocracia del...*, *op.cit.*, y en concreto al epígrafe, “Socialismo francés” (pp. 48-51). Un interesante estudio de caso ya citado de, SMITH, W. Rand, *The left's dirty...*, *op.cit.*.

¹²⁹ GÁMIR, Luis, “Política de privatizaciones en España”, *Revista Española de Control Externo*, vol. I, n° 2, (1999), p. 15. El ya varias veces citado economista conservador, quien fuera durante unos años el Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) es autor también de uno de los libros de referencia para esta cuestión: id., *Las privatizaciones en la España actual*, Madrid, Pirámide, 1999. En ambos trabajos se apuntan los principales datos y detalles de tal operación económica.

¹³⁰ Nos remitimos aquí a, FERNÁNDEZ, Zulima, “El alcance del proceso privatizador en España”, *Papeles de Economía Española*, n° 38, (1998), pp. 243-246.

¹³¹ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 200, *nota 33*.

¹³² *Ibíd.*, pp. 172-173.

Un balance de cuentas, en todo caso, efímero, pues a partir de los noventa volverían de nuevo las pérdidas millonarias, precisamente, cuando se habían eliminado las transferencias de capital por la vía de los *Presupuestos Generales*¹³³. Momento decisorio, en donde sin ya ningún tipo de ambigüedad se decidiría apostar en exclusiva por el sector privado, y completar el proceso de privatizaciones¹³⁴.

La operación privatizadora se llevaría a cabo mediante una doble vía: o bien, a través de la venta directa de empresas del Grupo INI sin carácter estratégico para el Estado; o bien, a través de la conocida fórmula de la Oferta Pública de Venta (OPV), lo que implicaba desinversiones parciales de empresas rentables en Bolsa. 70 operaciones de este tipo se realizarán entre 1985-1996. Por la primera vía se procedió a la venta de pequeñas y medianas empresas del INI, bajo el argumento de carecer del suficiente peso para competir en el mercado o directamente de no poseer carácter estratégico en el conjunto de la economía –consúltese la *Tabla 67*–. Una tesis cuando menos matizable, pues entre las “privatizadas” a través de este camino se encontraban SEAT o ENASA pero también Marsans o ATEINSA. Empresas todas ellas que aunque con dificultades económicas, hubieran tenido posibilidades de “sobrevivir” razonablemente en el mercado tras un posible proceso ordenado de saneamiento¹³⁵. Pero no sólo, pues como indicó Luis Gámir, “[l]a mayor parte de estas operaciones de venta se realizan con un coste para el Estado”¹³⁶. De esta forma, entre los escasos estudios que se han venido a presentar sobre esta operación, Francisco Comín calcula en cerca de 76.000 millones de pesetas en saldo negativo de la misma¹³⁷.

Por otro lado, a través de la OPVs se privatizaron o se pusieron en venta parcial, las grandes empresas del país (REPSOL, ENDESA, Telefónica...) –véase *Tabla 68*–¹³⁸. Un primer

¹³³ Noticia, “El presidente del INI anuncia un mal año y pérdidas de 61.262 millones en 1991”, *El País*, 28 de marzo de 1992. Véase lo apuntado en las *nota 124* y *nota 125*. Y por último consúltese, VERGÉS JAIME, Joaquín, “Efectos de las privatizaciones españolas sobre los Presupuestos Generales del Estado”, *Hacienda Pública Española*, nº 147, (1998), pp. 215-230. Al respecto véase también lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 272*.

¹³⁴ «La recuperación financiera de las empresas públicas tocó a su fin, no obstante, a medida que el ciclo económico mundial empeoró. Tras un período de resultados prometedores, el INI volvía a incurrir en pérdidas por valor de 86.000 millones de pesetas en 1991 y 79.000 millones de pesetas en 1992. Una vez que se excluye el sector eléctrico, que fue rentable durante toda la década, el déficit del grupo industrial ascendía, en realidad, a más de 200.000 millones de pesetas. Dos tercios de las pérdidas tuvieron su origen en los sectores del acero, aluminio, minería y transporte aéreo [...]. Aunque las transferencias públicas (en forma de subvenciones y transferencias de capital) habían decrecido hasta poco más del 1 por ciento del PIB en 1991, todavía ejercían una presión considerable en la posición del presupuesto estatal». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, pp. 198-199. Por su parte como recordaron Carmen Tomás e Ignacio Alonso los «límites del liberalismo de Carlos Solchaga siempre fueron los dineros que algunas compañías públicas en régimen de monopolio proporcionaban a las arcas del Estado. Desde ese prisma se entiende que una empresa como Campsa se mantuviera entre las faldas estatales hasta que se agotaron los plazos marcados por la Comunidad Europea». TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 187.

¹³⁵ Véase lo ya apuntado por, MOLINA ÁLVAREZ de CIENFUEGOS, Ignacio, “La liberalización de la economía española (por efecto de la pertenencia a la Unión Europea)” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, *op.cit.*, p. 302.

¹³⁶ GÁMIR, Luis, “Política de privatizaciones...”, *op.cit.*.

¹³⁷ COMÍN, Francisco, “La empresa pública en España contemporánea: formas históricas de organización y gestión (1977-1995)”, *Documento de Trabajo. Fundación Empresa Pública*, nº 9505, (1995). Consúltese también los datos ofrecidos por, BEL i QUERAL, Germà y COSTAS, Antón, “La privatización y sus motivaciones en España: de instrumento a política”, *Revista de Historia Industrial*, nº 19-20, (2001), pp. 105-132.

¹³⁸ Véase, BEL QUERALT, Germà, “Privatización en España, OPVs y premio bursátil: ¿aprendimos algo de la experiencia británica?”, *Hacienda Pública Española*, nº 144, (1998), pp. 3-15.

paso decisivo y sin vuelta atrás hasta su completa venta ya durante los gobiernos populares¹³⁹. Los argumentos en este campo aunque variaron –reducción del déficit público, el cumplimiento de los criterios de convergencia, el sufragio de las empresas en pérdidas...– no sería así en el objetivo final: la venta del sector público para refinanciar al Estado. Más allá de que desde el propio Estado en una primera fase se asegurara la dirección y control de estas mismas empresas, mediante diferentes formulas jurídicas, se procedió a un efectivo recorte del sector público empresarial más competitivo y eficiente¹⁴⁰. Al ataque implícito a lo *público*, vendría a sumarse la forma de su venta, a través de numerosas e intensas campañas publicitarias dirigidas al pequeño y mediano ahorrador¹⁴¹.

Campañas que contenían un no desdeñable mensaje político-ideológico: por vez primera, el ciudadano, el asalariado, podía entrar a “jugar” en bolsa a partir de la compra de pequeños paquetes de acciones¹⁴². Se calcula que a finales de los años ochenta había más de cinco millones de accionistas en Bolsa¹⁴³. En suma, la versión española de la “sociedad de propietarios”¹⁴⁴ con no pocos alcances utópicos¹⁴⁵. No terminan ahí los cálculos realizados en su

¹³⁹ Tras la llegada del Partido Popular al Gobierno, a los dos meses crearía el Consejo Consultivo de Privatizaciones en junio de 1996. Encargado de informar, asesorar y desarrollar de cuantas actividades se requirieran en esa dirección, jugaría un papel clave en la fase final de la privatización del sector empresarial público español. Sobre su papel político-económico nos remitimos a, DURÁ JUEZ, Pedro, “Principales recomendaciones del Consejo Consultivo de Privatizaciones”, *Información Comercial Española*, nº 772, (1998), pp. 109-124; y, CUADRADO ROURA, Juan Ramón y id., “Las privatizaciones en España y el Consejo Consultivo de Privatizaciones” en JORDÁN, Josep Mª y SÁNCHEZ ANDRÉS, Antonio (coords.), *Desafíos actuales de la política económica: un enfoque estructural y social*, Navarra, Thomson Civitas, 2008, pp. 99-132. Consúltese, por lo demás, su portal electrónico en donde se pueden localizar prácticamente toda la documentación ‘oficial’ generada por dicha institución así como todos sus participantes: www.ccp.es. Véase aquí también en términos políticos, RATO, Rodrigo, “La confianza y la política económica: Las privatizaciones”, *Información Comercial Española*, nº 772, (1998) pp. 3-7. Un balance de estos años en concreto, ARIÑO ORTIZ, Gaspar (dir.), *Privatizaciones y liberalizaciones en España: balance y resultados (1996-2003)*, II vols., Granada, Comares, 2004. Y en una línea crítica desde el periodismo de investigación, MOTA, Jesús, *La gran expropiación: las privatizaciones y el nacimiento de una clase empresarial al servicio del PP*, Madrid, Temas de Hoy, 1998.

¹⁴⁰ Asimismo en 1995 se aprobaría una legislación copiada en lo fundamental de la francesa, que iba a asegurar la Acción de Oro –la conocida *Golden Share* anglosajona– y que permitiría el control parcial del Estado sobre las decisiones más importantes de las empresas privatizadas. Consúltese a nivel político-económico; GONZÁLEZ-PARÁMO, Juan Manuel, “Privatización y eficiencia: ¿es irrelevante la titularidad?”, *Economistas*, vol. XIII, nº 13, (1995), pp. 32-43, dentro de un dossier dedicado exclusivamente a tal cuestión, y en donde también ha de citarse el trabajo de, ALVAREZ, Enrique y CALLEJA, Ángel, “Privatizaciones y el sistema de acción especial («golden share»)” (pp. 44-53); y, a nivel jurídico: SILVA OCHOA, Juan Carlos da, *El control jurídico de las privatizaciones de empresas*, Madrid, Civitas, 2003.

¹⁴¹ NAREDO, José Manuel, “Riqueza personal y familiar” en CAMPO, Salustiano del (coord.), *Tendencias sociales en...*, op.cit., vol. III, pp. 47-84, y en concreto el “Cuadro 12.3.1. Patrimonio total (billones de pesetas)” y “Cuadro 12.3.2. Patrimonio de los hogares (billones de pesetas)”.

¹⁴² Léanse los datos ofrecidos por, FREIXAS, Xavier y INURRIETA, Alejandro, “Comportamiento de la cotización en las nuevas salidas a Bolsa”, *Perspectivas del Sistema Financiero*, nº 42, (1993), pp. 97-105.

¹⁴³ COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Recuperación económica y...”, op.cit., p. 23. Consúltese también el esclarecedor trabajo de, BLANCO, Rosa y CALZADA TERRADOS, Blas, “La propiedad de las acciones en España (1992-1999)”, *Bolsa de Madrid*, nº 93, (2000), pp. 25-27.

¹⁴⁴ Numerosas han sido las críticas al respecto desde la izquierda social y académica sobre este singular proceso. Por ejemplo, la de Emmanuel Rodríguez: «La participación ‘popular’ en las rentas de capital ha acompañado las políticas de precarización del empleo, una compensación que sólo ha sido efectiva para los tramos altos y medios de la distribución de la renta, los únicos que han podido desarrollar cierta capacidad de ahorro». RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El gobierno imposible...*, op.cit., p.

día. Por ejemplo, se estima que durante este proceso se producirían 450.000 peticiones de minoristas. El resultado financiero, en este caso, sería positivo: prácticamente 1,7 billones de pesetas en conjunto¹⁴⁶ [consúltense en el “anexo” la *Tabla 69* y el *Gráfico 15* y el *Gráfico 16*].

Muchos de los costes sociales, humanos, político-ideológicos, regionales... de este doble proceso de desindustrialización y privatización de lo público se han destacado. Ahora bien, su contrapartida directa, en términos económicos, sería el incremento de la productividad de la industria tras tales operaciones. Argumentos sobre los que se apoyarían los propios *técnicos socialistas* para legitimar a posteriori dicha política. “Aunque los ocupados en la industria cayeron un 24 por 100 entre 1975 y 1992, el valor añadido real creado por la industria española aumento un 38 por 100, por lo que no cabe hablar de «desindustrialización», sino de mayor producción con menos empleo”, defendió en su día el mismo Miguel Boyer¹⁴⁷ [consúltense en el “anexo” la *Tabla 70*, la *Tabla 71* y la *Tabla 72*].

No obstante, lo que se discute con la evidencia empírica por delante es algo más trascendental como señaló el economista Juan Alberto Sanchis:

«Los procesos de reestructuración que se han llevado a cabo en las empresas públicas españolas han tenido, en la mayoría de los casos, efectos positivos sobre la productividad. Este resultado apoya la hipótesis de que la eficiencia puede mejorar a raíz de cambios en la organización y gestión de la empresa, sin resultar necesaria su venta al sector privado»¹⁴⁸.

Lo remarcábamos unas líneas más atrás: tras todo el denominado proceso de modernización productiva, resultaba que a finales de la “década del cambio”, por no volver a ampliar el ámbito cronológico, los verdaderos motores de la economía seguían girando en torno a la construcción y el turismo. Lejos quedaba el modelo productivo español de las economías europeas más próximas en cuanto a avances tecnológicos u otras materias similares. Si el segundo nodo del crecimiento económico constituía directamente una prolongación directa del franquismo, con respecto a la construcción durante los gobiernos socialistas, a partir del

53. E igualmente consúltense los trabajos contenidos en la obra colectiva de, MERINO, Raquel (dir.), *Una sociedad de propietarios. El camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera*, Madrid, Instituto Juan de Mariana, 2006.

¹⁴⁵ Al respecto consúltense un documentado trabajo sobre las grandes fortunas que *jugaban* en bolsa a lo largo de la década de los noventa en, RODRÍGUEZ DÍAZ, José Antonio, “Revisitando el poder: cambios en la estructura del poder económico (1991-2000)”, *Sistema*, nº 172, (2003), pp. 3-26.

¹⁴⁶ Para tales cifras consúltense: BEL i QUERALT, Germà, “Los costes financieros de la privatización en España”, *Información Comercial Española*, nº 772, (1998), pp. 125-144, dentro de un dossier monográfico dedicado al respecto; y en, GÁMIR, Luis, “El precio de venta de las empresas privatizadas”, *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, nº 4, (1999), pp. 283-294.

¹⁴⁷ BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, *op.cit.*, p. 94. Consúltense el trabajo MYRO SÁNCHEZ, Rafael, “Segunda reconversión y política industrial”, *Papeles de Economía Española*, nº 50, (1992), pp. 186-191. Véase, asimismo, para una comparación de este proceso con Europa el trabajo de, SARO JAUREGUI, Gabriel, “La política industrial” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del...*, *op.cit.*, pp. 421-440.

¹⁴⁸ SANCHIS, Juan Alberto, “Privatización y eficiencia en el sector público español”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. IV, nº 10, (1996), p. 88. Unos años antes consúltense el trabajo de, MYRO SÁNCHEZ, Rafael, “Las grandes empresas industriales españolas: Una comparación con el resto de los países de la CEE”, *Economía Industrial*, nº 257, (1987), pp. 135-155. Consúltense también los resultados ofrecidos por: ARTOLA, Concha, ARGIMÓN, Isabel y GONZÁLEZ-RÁRAMO, José Manuel, “Empresa pública y empresa privada: titularidad y eficiencia”, *Moneda y Crédito*, nº 209, (1999), pp. 45-93. En esta línea, LAFFONT, Jean J. y TIROLE, Jean, *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*, Massachusetts, MIT Press / Cambridge, 1993; y, MAJONE, Giandomenico, “Paradoxes of Privatization and Deregulation”, *Journal of European Public Policy*, nº 1, (1994), pp. 53-69. Por lo demás, véase, el trabajo técnico-jurídico de uno de los autores más prolíficos al respecto, BEL i QUERALT, Germà, *Privatización, desregulación y ¿competencia?* Madrid, Civitas, 1996.

conocido como el “decreto Boyer” se daría un paso cualitativo¹⁴⁹. Aquí confluían no pocos fenómenos históricos simultáneos: desde el estrictamente demográfico pasando por el hecho constatado de la mala calidad de las viviendas en España tras la llegada de la inmigración interior a las grandes ciudades durante el desarrollismo franquista, o el carácter netamente especulativo de este sector¹⁵⁰.

A partir del citado Real Decreto-Ley 2/1985 la plena mercantilización de los planes urbanísticos sería su más directa consecuencia¹⁵¹. Y la especulación su más acabo resultado final. Con razón distintas voces llegarían a calificar dicha política como “thacheriana”¹⁵². En este ámbito, como en otros tantos, los socialistas pondrían un especial empeño. Como trajo a colación la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid por aquellos tiempos, Isabel Villalonga,

«la promulgación de este decreto [*decreto Boyer*] fue acompañada en su momento por una recomendación del propio presidente del Gobierno, Felipe González, en forma de circular a alcaldes y concejales, destina a priorizar el fomento del sector de la construcción en detrimento de la necesaria e incipiente disciplina urbanística, calificando a esta última de mero ‘trámite burocrático’»¹⁵³.

Aprobado en abril de 1985 la lectura de su *Exposición de Motivos* –como se explicó en su momento– expresaba un más que firme planteamiento liberal de la economía. Consideradas como insuficientes todas las medidas que se habían tomado hasta el momento, el Gobierno decidía “adoptar un conjunto de medidas destinadas a estimular el consumo privado y la inversión, a fomentar el empleo y a impulsar el sector de la construcción”¹⁵⁴. Sus efectos no tardaron en llegar. Como queda reflejado en la *Tabla 73*, el total de viviendas protegidas iniciadas descendería de 142.221 para 1985 a 122.752, 101.527, 75.373 y 54.526 para 1986, 1987, 1988, 1989, respectivamente. Mientras que, en paralelo, el número de viviendas libres tendría un espectacular salto: 80.481, 92.231, 151.347, 194.102, 228.777 para los años anteriormente señalados. Con razón, se llegaría a señalar como en “los últimos años casi han desaparecido las viviendas de protección oficial y de promoción pública”¹⁵⁵.

¹⁴⁹ Consúltense lo apuntado en el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”.

¹⁵⁰ En primer lugar, véase el estudio central de, NAREDO, José Manuel, *La burbuja inmobiliario-financiera...*, *op.cit.*. Para la situación a principios de la década de los setenta consúltense el ya clásico estudio de, CASTELLS, Manuel, *Crisis urbana y cambio social*, Madrid, Siglo XXI, 1991. También véase el balance crítico de, TATJER, M^a Mercedes y GARCÍA, Emili, “La política de vivienda: el Estado del bienestar vulnerable” en GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), *Políticas públicas en...*, *op.cit.*, pp. 223-246.

¹⁵¹ Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, *sobre Medidas de Política Económica*.

¹⁵² CORTÉS ALCALA, Luis, “La modernización de...”, *op.cit.*, p. 65. Del mismo autor, consúltense, id., “El problema de la vivienda en España: elementos para su comprensión”, *Política y Sociedad*, nº 10, (1992), pp. 67-79. Y asimismo consúltense, OCDE, *La financiación de la vivienda pública: informe elaborado por la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico*, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1990.

¹⁵³ VILLALONGA, Isabel, “La necesaria derogación del ‘decreto Boyer’ de alquileres”, *El País*, edición de Madrid, 18 de marzo de 1991. En esta línea consúltense las ponencias de un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por Izquierda Unida, y recogidas en, HERRERA, Francisco (ed.), *Las grandes ciudades en la década de los noventa*, Madrid, Alfa Delta [1994].

¹⁵⁴ *Exposición de Motivos* del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, *sobre Medidas de Política Económica*. En todo caso, el documento que ha de destacarse fue un conocido informe gubernamental llevado a cabo por un ‘Comité de Expertos de Vivienda’: LEAL, Jesús (coord.), *Informe para una nueva política de vivienda*, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1992. Una lectura un tanto apresurada del mismo en, LÓPEZ GARCÍA, Miguel Ángel, “El informe del Comité de Expertos sobre vivienda: una valoración tentativa”, *Documento de Trabajo. Fundación de las Cajas de Ahorros*, nº 85, (1992).

¹⁵⁵ ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*, p. 139. Ambos autores todavía iban más lejos: «En 1985, el Gobierno intentó movilizar el mercado de vivienda de

Un *boom* de la vivienda privada coincidente con la “cultura del pelotazo”¹⁵⁶. Pero si además se comprueba el incremento del precio del metro cuadrado de la vivienda nueva, resulta que se pasará de un 6,5% en 1985 a un 8,9%, un 28,9%, un 23,3% en lo referido a sus incrementos anuales para también el lustro señalado¹⁵⁷. Un ejemplo concreto es lo suficientemente ilustrativo: mientras que en Barcelona el metro cuadrado de la vivienda nueva se situaba en 92.201 ptas. en 1985 para 1989 este se había más que duplicado hasta llegar a 229.841 ptas. de media¹⁵⁸.

De este intenso proceso no sólo saldrían beneficiadas las grandes constructoras privadas del país, sino también el sector financiero, que tras su reestructuración por la vía de la concentración de sus entidades, vería incrementado el número de depósitos y de créditos hasta límites no conocidos¹⁵⁹. Obteniendo, de hecho, los beneficios más altos de su historia en estos años, todo ello acompañado de normativas claramente favorables –consúltese la *Tabla 78*–¹⁶⁰.

alquiler mediante una liberalización del régimen de inquilinato, para hacer más atractiva la inversión privada en el sector. Paralelamente, se desplazó el peso de la ayuda pública desde la ayuda directa a la desgravación fiscal que, en 1989, representaba el 75% del costo de la ayuda pública en vivienda, beneficiando desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos [...]. El resultado es que en la última década, pese a un fuerte incremento de la demanda, las viviendas principales sólo han crecido en un 13% mientras que las residencias secundarias (favorecidas por la desgravación fiscal para los estratos sociales más acomodados) han crecido en un 94,3%, desequilibrando la estructura del parque inmobiliario». *Ibidem*.

¹⁵⁶ Por su parte desde el propio PSOE no se tendría empacho en afirmar lo siguiente: «El alza de los costes de la vivienda, los cambios en la estructura de edades de la población, la existencia de un parque inmobiliario no utilizado, las posibilidades que ofrece la rehabilitación, las nuevas formas de convivencia, el cambio en las necesidades y en los gustos obligan a una modificación de la política de vivienda, que actúe mediante la personalización de las ayudas públicas, tomando en consideración las condiciones económicas del destinatario, su renta y composición familiar». AHFPI, PSOE-CF, “Ponencia marco [al] 31 Congreso PSOE [Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre de 1987]”, Madrid, 1987, sig. Fc 652, pp. 40-41.

¹⁵⁷ Al respecto léase las consecuencias socio-económicas de este incremento para un alto sector de la población española en, SALINAS RAMOS y LEÓN PANIAGUA, José, *El derecho a la vivienda como factor de integración social: informe final España 1995*, Madrid, Cáritas Española, 1995. Y más en concreto en el apartado específico de, JUÁREZ, Miguel (dir.), *V Informe Sociológico...*, op.cit..

¹⁵⁸ Datos extraídos de, VALLS PLA, J., “El precio de compraventa de viviendas en Barcelona (1972-1996)” en VERGÉS, Ricard (ed.), *El precio de la vivienda y la formación del hogar*, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1996, pp. 33-46. Para un posible marco de comparación, nos remitimos al excelente y conocido estudio de, LEAL, Jesús, “El «boom» inmobiliario madrileño: precios altos para rentas bajas”, *Alfoz*, nº 46, (1987), pp. 23-84. Artículo incorporado dentro de un dossier monográfico sobre la problemática de la vivienda, en donde también es de interés también el trabajo de, HERNÁNDEZ, Eduardo y LEÓN PANIAGUA, José, “Hacia la desaparición de la vivienda pública” (pp. 86-93). Y asimismo el informe de, LUCAS, Ángel de, *Actitudes y representaciones sociales de la población de la Comunidad de Madrid en relación con los censos de población y de vivienda de 1991*, Madrid, Conserjería de Economía, 1992. Igualmente consúltese el dossier monográfico al respecto de *Papeles de Economía Española*, nº 50, (1992), entre la que destacaría la aportación de: CARRERAS YÁÑEZ, José Luis, “Perspectivas de la construcción en la década de los noventa” (pp. 210-237).

¹⁵⁹ Véanse los datos ofrecidos por, VILAGRASA, Joan, “Desarrollo urbano y promotores inmobiliarios en España. Una visión general” en id. (ed.), *Vivienda y promoción inmobiliaria en España*, Lleida, Universitat de Lleida, 1997. Y también en, CABRERA CABRERA, Pedro José, “El difícil acceso a la vivienda en España. Informe Nacional 2001”, octubre 2001 [original en poder del autor]. A complementar con el trabajo central de, NAREJO, José Manuel, CARPINTERO, Óscar y MARCOS, Carmen, *Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española, 1992-2004*, Madrid, FUNCAS, 2005.

¹⁶⁰ ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 72. Bajo el mandato de Carlos Solchaga, en línea con la liberalización del sector financiero, se aprobarían entre otras muchas las siguientes normativas en tal sentido: Ley 13/1985, de 25 de mayo, *de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información a*

Asimismo, tanto el sector de la construcción como el de la inversión mobiliaria, aumentarían su participación en la capitalización de los valores de renta variable oficialmente admitidos en la Bolsa de Madrid, como uno de los indicadores más exactos de la fortaleza económica de dichos sectores económicos durante la “década del cambio” [véanse en el “anexo” la *Tabla 73*, la *Tabla 74*, la *Tabla 75*, la *Tabla 76*, la *Tabla 77*, la *Tabla 78*, la *Tabla 79* y la *Tabla 80*].

El turismo, por su parte, siguió constituyendo un más que poderoso sector económico dentro de la Contabilidad Nacional, reforzando por esta vía su tradicional “papel como suministrador de servicios”¹⁶¹. Aunque ya no se registraron los espectaculares saltos en número de turistas que visitaban España durante las décadas de los sesenta y setenta, con todo se pasaría de 42.011.100 a 55.300.700 millones de visitantes extranjeros entre 1982 a 1992¹⁶². El sol, la playa y el “chiringuito” continuaron funcionando razonablemente bien de cara a los ingresos por turismo –se pasaría de 735.509.000 millones de ptas. a 2.497.351.000 millones de ptas. durante la década de estudio– y por tanto ayudaría a mejorar nuestra balanza de exportaciones de servicios turísticos sobre el PIB –en una media oscilante en torno al 4% de la riqueza nacional¹⁶³–. Pero no sólo, pues, con cifras cercanas 10% de la cuota de turismo mundial, este mismo saldo permitió, en conjunto, reequilibrar continuamente nuestra balanza comercial como se especificaba en la *Tabla 84*¹⁶⁴ [consúltense aquí también la *Tabla 81*, la *Tabla 82* y la *Tabla 83*].

Entre las insuficiencias y debilidades del modelo productivo español siempre repetidas, y que forman parte de nuestro “secular” retraso europeo, el comportamiento del gasto en I+D constituye una de sus máximas expresiones¹⁶⁵. Se señaló en el Capítulo previo como a pesar del esfuerzo en esta materia por parte de los gobiernos socialistas, el mismo nunca alcanzaría al gasto medio de los países de la UE. En esta situación influyó sobremanera una errática política tecnológica como se ha advertido en numerosas ocasiones¹⁶⁶. El diferencial de un punto de

los intermediarios financieros [B.O.E. 28 de mayo de 1985]; Orden, de 3 de marzo de 1987, sobre liberalización de tipos de interés y comisiones y sobre normas de actuación de las Entidades de depósito [B.O.E. 5 de marzo de 1987]; Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas [B.O.E. 15 de julio de 1988]; Ley 4/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores [B.O.E. 29 de julio de 1988]; o, Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito [B.O.E. 31 de mayo de 1989].

¹⁶¹ ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, op.cit., p. 111.

¹⁶² Véanse el siguiente informe institucional: SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, *Plan marco de competitividad del turismo español*, Madrid, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo / Secretaria General de Turismo, [1992].

¹⁶³ Remitimos a los datos expuestos en su día por, BUISÁN, Ana, “Exportaciones de turismo y competitividad”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. V, nº 13, (1997), pp. 65-91; y de la misma autora unos años antes, id., “Principales determinantes de los ingresos por turismo”, *Documento de Trabajo. Banco de España*, nº 9502, (1992). Y en esta línea dentro del dossier monográfico al respecto de *Información Comercial Española*, nº 749, (1996), los trabajos de, FIGUEROLA, Manuel, “Incidencia y efectos multiplicadores del turismo en la economía española” (pp. 17-31); y, ESTEBAN ROMERO, Alberto, “Previsiones de la demanda turística” (pp. 89-97).

¹⁶⁴ Consúltense; FIGUEROLA PALOMO, Manuel, *Teoría económica del turismo*, Madrid, Alianza, 1985; PEDREÑO MUÑOZ, Andrés (dir.) y MONFORT MIR, Vicente M. (coord.), *Introducción a la economía del turismo en España*, Madrid, Civitas, 1996; VELLAS, François, *Economía y política del turismo internacional*, Madrid, Síntesis, 2004.

¹⁶⁵ Véase lo anteriormente reflejado en el Capítulo 7, *nota 243* y *nota 244*, junto con un balance general aclaratorio de, GONZÁLEZ BLASCO, Pedro, “I+D en la España de los noventa (Gastos, ingresos y personal)”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 85, (1999), pp. 131-170.

¹⁶⁶ Trabajos muy aclaratorios desde la propia óptica socialista: ROJO CHAMORRO, Juan Manuel, “La política científica y tecnológica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (coords.), *La década del...*, op.cit., pp. 381-411. Asimismo véase el dossier monográfico de la revista *Arbor*, nº 554-555, (1992), titulado, *El sistema español de ciencia y tecnología*, y en concreto los textos de, QUINTANILLA FISAC, Miguel Ángel, “El sistema español de Ciencia y Tecnología y la política I+D” (pp. 9-30); y, id. y MALTRÁS, Bruno, “La estructura de producción científica en España (1981-1989) y

media como queda señalado en la *Tabla 85*, muestra las limitaciones en esfuerzo tecnológico siempre por debajo del 1% del PIB. Una cuestión que todavía aparece más clara cuando se plantea el gasto privado en I+D en porcentaje del PIB, también siempre por debajo al correspondiente del gasto público, lo que viene a expresar otra de las características intrínsecas sobre el comportamiento del sector privado empresarial del país.

El resultado: una balanza tecnológica siempre negativa que de forma progresiva iría agrandándose pasando de un saldo de 64.276,50 millones de pesetas en 1982 a otro de 267.042,10 millones de pesetas diez años después. Todo ello en términos negativos. Por lo demás, junto al descenso de patentes solicitadas y concedidas en estos mismos años, en el momento en que se procede a valorar las mismas, según los sectores con más probable uso de la tecnología solicitada, aparece constantemente la industria por encima de cualquier otro sector. Dos realidades estadísticas que certifican, en conjunto, otras dos señas más de identidad de dicho modelo productivo. [consúltense en el “anexo” la *Tabla 85*, la *Tabla 86*, la *Tabla 87*, la *Tabla 88* y la *Tabla 89*]¹⁶⁷.

Con tal cuadro por delante, ahora sí es posible interrogarse por los niveles de competitividad y productividad del mercado nacional, una vez que se tiene presente tanto la evolución de la cuestión salarial como la estructura del tejido productivo¹⁶⁸. O dicho con otras palabras, nos encontramos ante una de las principales características del modelo de regulación capitalista español¹⁶⁹, así como la implantación de unos particulares paradigmas productivos-organizativos¹⁷⁰.

las prioridades del Plan Nacional” (pp. 107-132). Por lo demás, SÁNCHEZ PADRÓN, Miguel, “El cambio tecnológico” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., pp. 501-546, y en concreto el apartado, “El Plan Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. ¿La vía española hacia la modernización tecnológica?” (pp. 518-232); BUESA, Mikel, “Política tecnológica: una visión global”, *Economistas*, vol. X, nº 52, (1992), pp. 296-305; y en concreto, LÓPEZ GARCÍA, Santiago y VALDALISO, Jesús M^a (eds.), *¿Qué inventen ellos? Tecnología, empresa y cambio económico en la España contemporánea*, Madrid, Alianza, 1997.

¹⁶⁷ Una vez más Carmela Martín señalaría al respecto: «Los datos sobre las patentes proporcionan, sin embargo, una [visión] menos optimista. Más concretamente, conforme a las cifras de solicitudes de patentes europeas, la posición tecnológica de España también ha mejorado [...]; sin embargo, su peso en el conjunto de patentes de todos los miembros de la UE es sólo del 1,4 frente al 6,2 por 100 [...] en términos de publicaciones científicas. En consecuencia, a tenor de esta información parece ser que los recursos financieros y humanos dedicados a I+D han dado más frutos en el ámbito de los avances científicos que en el de los inventos e innovaciones». MARTÍN GONZÁLEZ, Carmela, “La situación tecnológica: cambio técnico y política tecnológica” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit., p. 367. Véase en ese texto el “Cuadro 4. Publicaciones científicas españolas y de la UE, 1986-1995” (p. 366). Por lo demás, SURÍS i JORDÀ, Josep M^a, *La empresa industrial española ante la innovación tecnológica*, Madrid, Hispano Europea, 1986. Y consúltense también los informes de CASTELLS, Manuel, *El impacto de las nuevas tecnologías en la economía internacional: implicaciones para la economía española*, Madrid, Instituto de Estudios de Prospectiva, 1990; y, SÁNCHEZ MUÑOZ, M^a Paloma, *La demanda de tecnología en España en la década de los 90*, Madrid, Instituto de Estudios y Análisis Económicos, 1992.

¹⁶⁸ Desde un prisma eminentemente crítico en: GUERRERO, Diego, *Competitividad: teoría y política*, Barcelona, Ariel, 1995.

¹⁶⁹ Referencias centrales sobre las que descansa este trabajo en, BOYER, Robert, *Teoría de la regulación. Un análisis crítico*, Valencia, Alfons el Magnàmin, 1992 [traducción de, *Regulation School: A...*, op.cit.]; id., *Crisis y regímenes de crecimiento. Una introducción a la teoría de la regulación*, Buenos Aires, Niño Dávila / Ceil Piette, 2007. Todo ello junto con lo apuntado en el Capítulo 2, *nota 106*, *nota 108* y *nota 109*.

¹⁷⁰ Junto con las referencias básicas como las de, CASTILLO, Juan José, *Las nuevas formas de organización del trabajo: viejos retos de nuestro tiempo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988; id., “Reestructuración productiva y organización del trabajo” en MIGUÉLEZ Faustino y PRIETO, Carlos (coord.), *Las relaciones de...*, op.cit., pp. 23-42; COLLER, Xavier, *La empresa flexible...*, op.cit.; o, ALONSO, Luis Enrique, *Trabajo y posmodernidad...*, op.cit.. A resaltar también el

En tal tarea se deben de tener en cuenta por lo menos cuatro indicadores: el coste laboral unitario, la productividad por hora, la productividad por ocupado y lógicamente la remuneración por asalariado. Pero primero vayamos a lo que ha indicado, al respecto, la lectura dominante:

«la competitividad y el coste salarial unitario están relacionados inversamente y [...] existe una relación causal entre las dos variables, de modo que un aumento en el coste salarial unitario conduce a una disminución de la competitividad, medida por el rendimiento del comercio exterior»¹⁷¹.

Una tesis que, pese a la falta de demostración empírica en muchos de los casos estudiados¹⁷², ha pre-condicionado generalmente las políticas salariales de tipo gubernamental,

dossier monográfico de *Sociología del Trabajo*, nº 27, (1996), titulado, *Emergencia de nuevos modelos productivos*. Con entre otros textos como los de, BOYER, Robert y FREYSSINET, Michael, “Emergencia de nuevos modelos industriales: Problemática del programa internacional del GERPRISA” (pp. 23-54). Trabajos y estudios de caso en castellano en, BILBAO, Andrés, CACHÓN, Luis y PRIETO, Carlos, *Políticas empresariales de mano de obra (Un estudio realizado en la cuenca industrializada del sur madrileño)*, Madrid, Comunidad de Madrid, 1991; CASTILLO, Juan José y LÓPEZ CALLE, Pablo, *Los obreros del Polo...*, op.cit.; LAHERA SÁNCHEZ, Arturo, *Enriquecer el factor...*, op.cit.; CASTILLO, Juan José, *El trabajo fluido...*, op.cit.. Teniéndose también presente, el trabajo central de, BURAWOY, Michael, *El consentimiento en...*, op.cit.. junto con el que quizás sea menos conocido en nuestro país: GAUDEMAR, Jean-Paul, *El orden y la Producción*, Madrid, Trotta, 1991; y otro clásico: KERN, Horst y SCHUMANN, *El fin de la división del trabajo: racionalización en la producción industrial. Situación actual, determinación de las tendencias*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988. Véase aquí el apartado “2.4.1. El mundo del trabajo y las relaciones laborales: un balance generalista”.

¹⁷¹ CORIAT, Benjamin, “Las nuevas dimensiones de la competitividad: Hacia un enfoque europeo”, *IPTS report*, 1997, p. 3 [original en poder del autor]. Además de lo señalado en el Capítulo 7, nota 203 y nota 204, y en el presente en nota 54 consúltense entre una amplia bibliografía: RAYMOND BARA, José Luis, “La estructura productiva de la economía española y su evolución”, *Papeles de Economía Española*, nº 50, (1992), pp. 2-20; MATÉ RUBIO, José M^a, “La productividad del trabajo en España y en la UE: Análisis comparado del conjunto de la economía y de la industria manufacturera”, *Papeles de Economía Española*, nº 63, (1995), pp. 112-125; ZAMORA SANZ, M^a del Mar y ESTAVILLO DORADO, Julio, “Un análisis sectorial-regional de la productividad del trabajo en España”, *Cuadernos de Estudios Empresariales*, nº 12, (2002), pp. 27-48; DEHSA ROMERO, Guillermo de la, “Perspectivas de empleo y la productividad en España”, *Información Comercial Española*, nº 826, (2005), pp. 483-500; GUAL, Jordi, JÓDAR ROSELL, Sandra y RUIZ POSINO, Alex, “El problema de la productividad en España: ¿Cuál es el papel de la regulación?”, *Documentos de Economía “La Caixa”*, nº 1, (2006). De enorme valor fue el dossier monográfico de *Información Comercial Española*, nº 829, (2006), titulado, *Productividad y competitividad de la economía española*. A destacar dentro de él: ESTRADA GARCÍA, Ángel, PONS, Alex y VALLÉS, Javier, “La productividad de la economía española: una perspectiva internacional” (pp. 7-25); RAYMOND BARA, José Luis y ROIG SABATÉ, José Luis, “La dotación de capital humano en la economía española” (pp. 67-91). Asimismo más extensamente: MONTUENGA GÓMEZ, Víctor Manuel, *Salario, productividad e inflación en la economía española*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1999; y, BANEGAS, Jesús, *La nueva economía en España: las TIC, la productividad y el crecimiento económico*, Madrid, Alianza, 2003. Desde una perspectiva netamente “liberal”: HERNANDO, Ignacio y VALLÉS, Javier, “Productividad sectorial: comportamiento cíclico en la economía española”, *Documentos de Trabajo. Servicios de Estudios del Banco de España*, nº 9323, (1993); RODRIGO ILLERA, Carlos, *Productividad, eficacia y cambio técnico en las empresas de Europa: con especial referencia a España*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2003; SÁNCHEZ MANGAS, Rocío, *La productividad en la sociedad de la información: impacto de las nuevas formas de organización del trabajo*, Madrid, FEDEA, 2007. Trabajos de conjunto: MAROTO SÁNCHEZ, Andrés y CUADRARO ROURA, Juan Ramón, *La productividad en la economía española*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2006; y, SEGURA, Julio (coord.), *La productividad en...*, op.cit..

¹⁷² En este sentido debe citarse el excelente trabajo colectivo de, PFALLER, Alfred, GOUGH, Ian y THERBORN, Göran, *Competitividad y Estado...*, op.cit.. Un trabajo en donde los autores introdujeron, a nivel teórico, la diferenciación entre *productividad aparente* y *productividad subyacente*. Dos términos a tener muy presentes. Por lo demás, son igualmente importantes diversos informes de la OCDE al respecto: OECD, *The Tax/Benefit position of production workers, 1979-1984*, Paris, OECD, 1986; id.,

sobre otros factores productivos, que pudieran ir desde el I+D –véase la *Tabla 24*– a otros aspectos relacionados con la mejora de las oportunidades competitivas sobre otras bases.

La estrategia de la modernización socialista en busca de una mano de obra cuantitativa y cualitativamente, barata de cara a generar confianza y atraer inversiones, legitimará tanto a nivel teórico como en la práctica las estrategias empresariales que se ponen en marcha en este sentido. Su efecto más relevante sería la “desconexión entre salarios y productividad”¹⁷³. A partir del “estancamiento (aún e incluyendo todo tipo de cotizaciones sociales) de los salarios reales brutos por persona” en estos años, este *factor* permitiría, a su vez, que los “aumentos de productividad [...] [disminuyan] los costes laborales unitarios en términos del precio de producto”¹⁷⁴.

¿Se cumple, por tanto, en el caso español la tesis clásica liberal en torno a la relación inversa entre salarios y competitividad? ¿En qué medida y con qué condicionantes?¹⁷⁵ Con los

The Tax/Benefit position of production workers, 1984-1987, Paris, OECD, 1988; id., *The Tax/Benefit position of production workers, 1989-1992*, Paris, OECD, 1993; y en concreto, NICOLETTI, Giuseppe y SCARPETTA, Stefano, “Regulation, productivity and growth: OECD evidence”, *Working Paper. OECD Economics Department*, nº 347, (2003). Por último consúltese el estudio básico y clásico de, AGLIETTA, Michel, *Regulación y crisis...*, *op.cit.* junto con el trabajo más próximo a nuestro tiempo de, ARRIGHI, Giovanni, *El largo siglo...*, *op.cit.* Y entre otra línea complementaría: BOLTANSKI, Luc y CHIAPELLO, Ève, *El nuevo espíritu...*, *op.cit.*

¹⁷³ RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El gobierno imposible...*, *op.cit.*, p. 47. «El sistema de regulación y control de la fuerza de trabajo se desplazaba, así, de la negociación salarial –de acuerdo con relación salario/productividad– al control monetario y la sujeción de la inflación». Ibídem. Una desconexión vista positivamente desde el ámbito gubernamental: «Al cabo de los tres trienios el crecimiento de la productividad macroeconómica se ha situado por fin en niveles próximos al 1 por 100, lo que implica que a partir de esta última etapa el tipo de nexos entre productividad y salarios resulta menos relevante, e incluso se convierte en algo altamente conveniente para el buen funcionamiento de las empresas y el clima de cooperación entre empleados y empleadores». ESPINA, Álvaro, “Diez años en la vida de España. Las políticas laborales y de empleo” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 454.

¹⁷⁴ ROCA, Jordi, “La distribución de la renta entre las clases sociales” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, *op.cit.*, p. 641. Por su parte Torres López y otros, introdujeron otras valoraciones a tener muy presentes: «Aunque la discusión sobre este asunto es siempre controvertida, y depende mucho de las fuentes estadísticas que se utilicen, se puede aceptar como un hecho que durante los años ochenta [...] tanto los costes laborales unitarios reales como la participación de la remuneración (bruta) de los asalariados corregida de la variación en la población asalariada han disminuido de manera importante, tanto en los años de expansión como en los de crisis. Sin embargo, las cifras de paro no han dejado de aumentar [...]. Pero es que si se compara la posición española con la europea, resulta que nuestros costes laborales unitarios reales eran en 1991 un 83,6% del índice 100 correspondiente a 1980, prácticamente diez puntos por debajo de la Europa de los doce, y ocho puntos menos que los de Alemania o Francia». TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, pp. 36 y 38, respectivamente. De la misma opinión era Jesús Albarracín: «[E]l crecimiento de los salarios reales se situara por debajo del de la productividad [...] que continuó registrando crecimientos apreciables, dado la política de ajuste y el descenso del empleo, y la consecuencia fue [...] una reducción de los costes laborales reales por unidad de productivo que ha sido sistemática desde 1980». ALBARRACÍN, Jesús, “La política económica y el empleo” en id. (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, p. 153.

¹⁷⁵ Junto con lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 93*, *nota 244*, *nota 245* y *nota 273* y en el Capítulo 7, *nota 106* y *nota 118*, consúltese: REY DEL CASTILLO, Carlos M., “Los salarios y la competitividad de la economía española”, *Relaciones Laborales*, nº 1, (1991), pp. 1145-1156; ESPINA, Álvaro, “Estrategias de creación de empleo y competitividad: salarios, contratación laboral y políticas activas en España (1976-1994)”, *Hacienda Pública Española*, nº 132, (1995), pp. 7-34; id., “El impacto de la negociación colectiva sobre los salarios, los costes y la competitividad: un análisis gráfico”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 124-125, (1997), pp. 52-81; y desde otro enfoque, TORRES LÓPEZ, Juan, “La competitividad de la economía española”, *Temas para el debate*, nº 162, (2008), pp. 69-70.

datos en la *mano* sobre la evolución salarial, nos detenemos, en primer lugar, en el comportamiento de los Costes Laborales Unitarios (CLU) que ofrece Eurostat, y que se obtiene del coeficiente resultante entre los salarios nominales y la productividad. He aquí una posible *valoración* a partir de los datos expuestos en la *Tabla 90*: los CLU mantuvieron una diferencia bajista considerable durante la década de los años ochenta con respecto a los países europeos. En total, los CLU reales descendieron 17,3 puntos en la “década del cambio”¹⁷⁶. Una diferencia especialmente aguda durante la segunda mitad de los años ochenta con una media de cuatro puntos de distancia. Es decir, el periodo donde más rápidamente empleo se creó. Un apunte más. Si los CLU fueron sistemáticamente inferiores al IPC, año tras año, se nos aparece en el horizonte una cuestión que en pocas ocasiones se apunta: “desde 1980, al menos, los beneficios también han sido responsables de la inflación”¹⁷⁷.

En la *Tabla 91* que establece el año 1991 como un índice 100, compara la evolución de los costes salariales unitarios tanto con la UE como con Estados Unidos. Se vuelve a revelar como el diferencial competitivo en relación a la productividad se basó, en lo central, en la consecución de unos bajos niveles de los costes laborales unitarios [véase en el “anexo” también la *Tabla 92*]¹⁷⁸.

A la hora de calibrar los índices de productividad no sólo tenemos que fijarnos en los CLU, sino también en los niveles de creación de empleo y desempleo, respectivamente¹⁷⁹. Tanto los datos del Eurostat, los procedentes del Banco de España así como, de nuevo, los del Modelo Hermin-España apuntan a la misma dirección: la productividad por persona empleada sería más alta cuando mayor nivel de desempleo existía y cuando se produce una reducción de los costes laborales.

¹⁷⁶ Consúltense entre una amplia gama de estudio: CRUZ ROCHE, Ignacio, “Cotizaciones a la Seguridad Social y coste factor trabajo” en CARABANA MORALES, Julio (coord.) y GARRIDO, Luis (ed.), *Reparto de trabajo y crisis social*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 171-182; PÉREZ INFANTE, José Ignacio, “Costes laborales y competitividad de la economía española” (pp. 204-234); FOLGADO BLANCO, José, “Coste laboral, y competitividad y empleo de la economía española” (pp. 235-242)”, ambos en el dossier monográfico *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25-26, (1994), dedicado a *El coste del factor trabajo*; ALTUZARRA, A., “Cotizaciones sociales, coste laboral y competitividad en la economía española”, *Cuadernos Europeos de Deusto*, nº 17, (1997), pp. 11-38. Desde una perspectiva global la controvertida obra de: PÉREZ DOMÍNGUEZ, Carlos A., *Los salarios en España durante la década de los ochenta: un análisis de su evolución*, Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 1997; MORAL, Esther y HURTADO, Samuel, “Evolución de la calidad del factor trabajo en España”, *Documento Ocasional. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 0306, (2003); SIMÓN PÉREZ, Hipólito J. FERNÁNDEZ, Melchor y MEIXIDE VECINO, Alberto, “Empleos de bajos salarios y pobreza en España”, *Revista de Economía Laboral*, vol. I, nº 1, (2004), pp. 76-94. Y finalmente el informe de, ANDRÉS DOMINGO, Javier, DOMENECH, Rafael y TAGUAS, David, “Desempleo, ciclo económico y participación de las rentas de trabajo en la economía española”, *Documento de Trabajo. Ministerio de Economía y Hacienda*, nº 96001, (1996).

¹⁷⁷ ALBARRACÍN, Jesús, “La política económica y el empleo” en id. (ed.), *Reflexiones sobre política...*, *op.cit.*, p. 151.

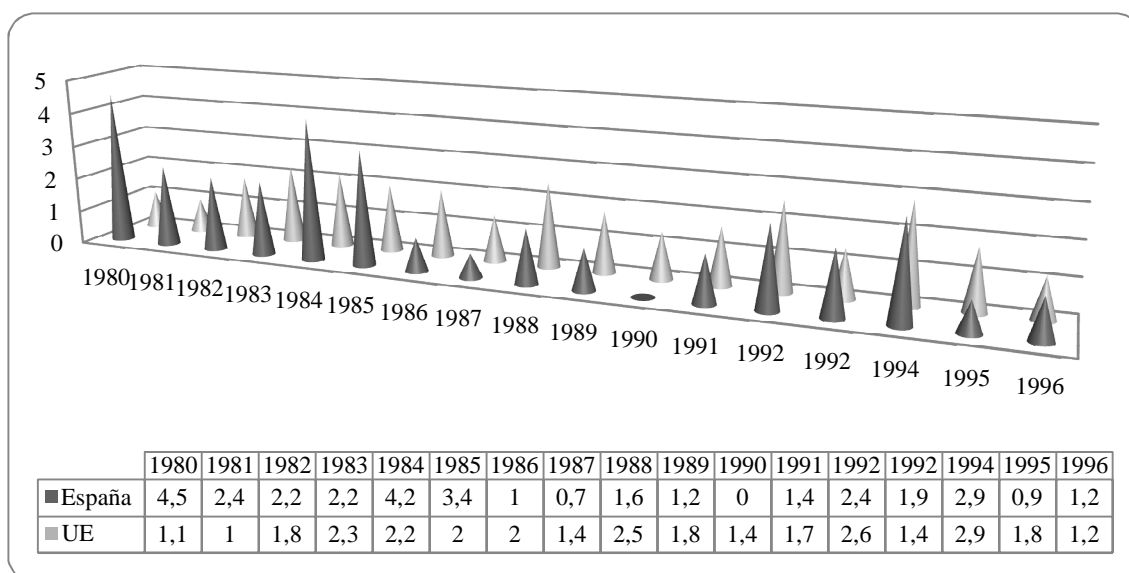
¹⁷⁸ La explicación dada en su día por Rafael Muñoz de Bustillo es aclaratoria de todo lo dicho hasta el momento: «[E]l incremento del EBC, bien de nueva creación o la degradación de los empleos ya existentes mediante su precarización y descualificación, tampoco se puede considerar como un mecanismo positivo para aumentar la competitividad de las empresas. En la medida en que la reducción de los CLU reales que en su caso se genere por esta vía exima a las empresas de la urgencia por buscar y poner en marcha mecanismos para aumentar su productividad, y por lo tanto siente las bases para que a medio plazo vuelvan a aparecer problemas competitivos que fuercen a una nueva actuación sobre los salarios como media –de nuevo urgente– para incrementar la competitividad y lucha contra la pérdida de mercados y el desempleo resultante». MUÑOZ DE BUSTILLO, Rafael, “Salarios, desempleo y calidad de empleo” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 193.

¹⁷⁹ Véanse los datos ofrecidos en el apartado “8.3.El «precio» de la modernización”.

En el *Gráfico 17* que compara la productividad por persona empleada tanto en España como en la UE, el incremento de la misma se da en los años del ajuste duro, 1982 a 1986, para volver descender en el periodo de expansión económica cuando crece más significativamente la inversión privada, la tasa de ahorro privado, y por tanto la Formación Bruta de Capital Fijo – véase nuevamente, la *Tabla 34*¹⁸⁰.

Asimismo, mientras que la productividad por persona empleada superaba a la media europea durante la primera fase, una vez preestablecidos los principales (aunque siempre) equilibrios macroeconómicos –véase la *Tabla 93* sobre las tasas anuales de empleo/desempleo según Eurostat– este indicador muestra unas menores tasas. Por su parte, la base de datos del Banco de España en relación a las tasas de variación anual por coste laboral unitario, productividad por hora y productividad por ocupado, refrenda la relación causal existente entre mayores salarios y menos productividad. Especialmente son relevantes los datos coincidentes con el periodo del pago de la “deuda social”. Así mientras que en 1990, 1991 y 1992 el incremento del CLU es de 10,1%, 8,6% y 8,5% la productividad por hora y la productividad por ocupado desciende al 0,3%, 2%, 2,7% y 0%, 1,4% y 2,4%, respectivamente –consúltense también el *Gráfico 18*–. Por último, a partir de la base de datos del Modelo Hermin-España que mide el coste laboral real, el coste laboral unitario y la productividad en conjunto se vuelve a cotejar la interconexión de estos supuestos [consúltense en el “anexo” también la *Tabla 94*].

Gráfico 17. Evolución comparada de la productividad por persona empleada en España y en la UE, 1980-1996 (%)

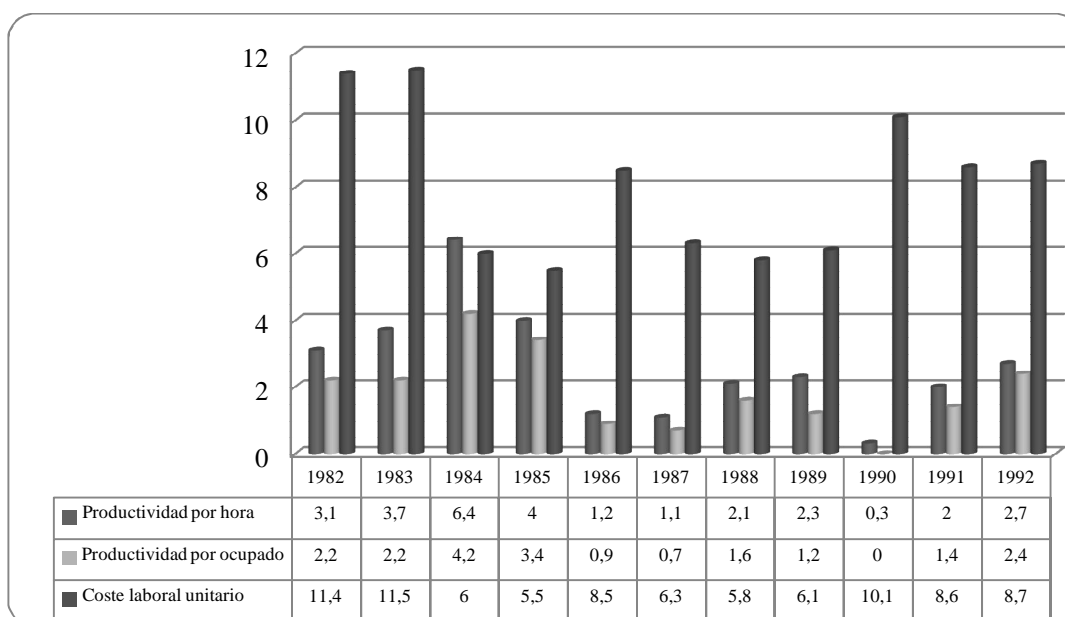


Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Nota: PIB a precios de mercado de 1995 por persona empleada.

¹⁸⁰ Dentro del ya citado dossier monográfico *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25-26, (1994), dedicado a *El coste del facto trabajo*, véanse: CARGÍA SERRANO, Carlos García y JIMENO SERRANO, Juan Francisco, “La participación de las rentas del trabajo y de los beneficios en la renta nacional” (pp. 73-84).

Gráfico 18. Evolución de las tasas anuales (%) de la productividad por hora, la productividad por ocupado y el coste laboral unitario en España, 1982-1992



Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Caracterizado buena parte del modelo productivo español –bajos salarios, bajo nivel de productividad e intensificación del factor trabajo¹⁸¹– es hora dar otro paso más. Un paso que mucho tiene que ver con la resolución concluyente de los *trade-off* entre crecimiento e igualdad y entre inflación/desempleo. De esta forma, la evolución de las rentas salariales en sus diferentes apartados señalan un aspecto sustancial, tanto en términos económicos como históricos: la redistribución de la renta primaria en las relaciones productivas. O dicho con otras palabras, la modificación de las relaciones capital-trabajo¹⁸². Principal vía –recuérdese– de cara a verificar la “tesis de la explotación”¹⁸³.

¹⁸¹ Como se ha insistido en otras líneas, este proceso aquí reseñado se ha producido de forma generalizada en todas y cada una de las economías mundiales capitalistas: «El ‘factor trabajo’ no ha tenido algún tipo de beneficio en términos de redistribución real de tales incrementos de productividad. En realidad, no se ha realizado un aumento ocupacional, ni los correspondientes aumentos de los salarios reales, ni mucho menos reducciones significativas en el horario del trabajo que actualmente se mantiene no muy lejos del habitual a finales de los años 50 del siglo XX». ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, *op.cit.*, p. 20.

¹⁸² «En definitiva, se puede decir que estos criterios han generado un proceso prácticamente permanente de modificación en la distribución primaria de la renta a favor del excedente empresarial y, en consecuencia, desfavorable para los asalariados en su conjunto. De esa forma, no sólo se ha deteriorado la principal fuente de ingresos, cuando no la única, de la mayoría de población, sino que, al ser también los salarios un determinante fundamental de la productividad, se ha incentivado la adaptación más fácil para las empresas: la que en lugar de favorecer incrementos de productividad se asienta en la reducción de los costes de producción salariales». TORRES LÓPEZ, Juan, MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara...*, *op.cit.*, p. 41. Claro está, que este proceso de agudo desequilibrio entre capital/trabajo se ha visto, o se ha querido ver, a pesar de los datos incontestables, desde otros puntos de vista cuando menos contradictorios, y que no tienen en cuenta las más mínimas bases sociológicas y políticas de las realidades que configuran un mercado de trabajo bajo un régimen capitalista: «Los indicadores meramente económicos son cada vez menos válidos. En los últimos años la relación entre salarios y beneficios brutos disponibles no hace más que descender: es alrededor del 86% en 1981, y se reduce al 69% en 1992 (es decir un decremento del 19%). Cada vez se paga más indirectamente a través de las prestaciones sociales, que en 1981 suponen un 14% de la renta bruta disponible, y en 1992 con ya

Identificadas las políticas así como a sus protagonistas e interlocutores principales, este proceso a lo largo de la “década del cambio”, conllevará una mutación de fondo de las posiciones de fuerza en el mercado de trabajo con un claro “ganador”: la rentabilidad del capital¹⁸⁴. Junto a los perversos efectos de la temporalidad/precariedad, el desempleo estructural, la apertura del abanico salarial junto con otros tantos; hay que sumarle el incremento del Excedente Bruto de Explotación (EBE) en detrimento de las rentas del trabajo¹⁸⁵. Un fenómeno observado igualmente en el resto de los países de la OCDE¹⁸⁶.

Disponemos aquí de dos indicadores fundamentales. En primer lugar, si sigue la evolución de ambas variables –EBE/Rentas del Trabajo– a partir de la estructura factorial del VAB a coste de factores –el indicador más fiable y ajustado– las políticas de ajuste positivo conducirán a disminuir la participación de las rentas del trabajo en casi cuatro puntos a favor del EBE. Prácticamente a un punto por año. En otras palabras, un fenómeno económico que no tiene precedentes. Unos datos que calibrados, de forma oportuna, son concluyentes acerca del notabilísima pérdida del peso de las rentas del trabajo como consecuencia directa de la política liberal aplicada por los gobiernos socialistas¹⁸⁷. Aunque ciñéndonos en concreto a los diez años que van entre 1982 a 1992, se observa como al finalizar dicha década se vuelve a la situación de

el 20% (es decir un incremento del 37%). Esto puede considerarse como un pago indirecto de la población que trabaja. Es un proceso desigualador: los salarios cada vez suponen una proporción menor en la renta bruta disponible. Pero puede ser visto también como un factor de igualación: el sector público atenúa la tendencia a la desigualdad asegurando obligatoriamente que una proporción mayor de la masa salarial se dedica a prestaciones sociales directas, y sobre todo a las personas más necesitadas». MIGUEL, Jesús de, *Estructura y cambio...*, op.cit., pp. 293-294. Complementéase lo anterior con dos trabajos contenidos en el dossier *Sociedad y Utopía*, nº 29, (2007), bajo el título *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social* y coordinado y editado por, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Las relaciones capital-trabajo en España: la «cultura de la precariedad» como pauta cultural”; JURADO GUERRERO, Teresa, “La precariedad temporal-salarial y sus efectos sobre la formación familiar”.

¹⁸³ Véanse los datos aportados en el apartado “8.4. Un posible balance en torno a la época socialista alejado de los lugares comunes”.

¹⁸⁴ Junto con los trabajos previamente citados consúltense con detenimiento: CÁMARA IZQUIERDO, Sergio, *Tendencias de acumulación...*, op.cit.. NIETO FERRÁNDEZ, Maximiliano, “Rentabilidad y distribución...”, op.cit.; y, id., *Dinámica salarial y...*, op.cit..

¹⁸⁵ Consúltense aquí uno de los trabajos más fundamentados sobre el propio EBE, que viene a presentar toda una serie de cálculos a tener muy presentes: ESTEVE MORA, Francisco y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Margen y distribución funcional de la renta: algunas relaciones teóricas y su aplicación para el caso español”, *Hacienda Pública Española*, nº 116, (1990), pp. 145-154. Una interpretación notablemente diferente en, SANZ DÍAS, Begoña, “Las rentas de trabajo: salarios y pensiones. Discrepancias entre los datos tributarios y la Contabilidad Nacional de España”, *Papeles de Trabajo. Instituto de Estudios Fiscales*, nº 21, (1995).

¹⁸⁶ Véanse los datos manejados en, LÓPEZ, Isidro y RODRÍGUEZ, Emmanuel, *Fin de ciclo...*, op.cit., y en concreto dentro del epígrafe quinto el apartado, “El asalto a los salarios: las raíces sociales de la burbuja patrimonial” (pp. 221-ss.).

¹⁸⁷ Junto con la bibliografía apuntada en notas anteriores, consúltense los importantes trabajos de, PÉREZ MORENO, Salvador y ARANDA GONZÁLEZ, Juan José, “Distribución de la renta y crecimiento económico en España (1985-1995)” en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA APLICADA (ed.), *Anales de Economía Aplicada. XIV Reunión ASEPELT-España. Oviedo, 22 y 23 de junio de 2000*, [CD-ROM]; GALINDO MARTÍN, Miguel Ángel, “Distribución de la renta, crecimiento y política fiscal”, *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 25, (2004). Para una comparación internacional, ABRENA, Matthew, EPSTEIN, Gerald y POWER, Dorothy, “Trends in the Rentier Income Share in OECD Countries, 1960-2000”, *PERI Working Papers*, nº 58, (2003). Por último, HARO GARCÍA, Julia, *Medición de la desigualdad y del bienestar social. Análisis de la distribución de la renta (1981-1991)*, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 1994; y, SALAS, Rafael, ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago y PRIETO RODRÍGUEZ, Juan, “The evolution of income inequality in the European Union”, *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 2, (2002).

partida –otra vez el *efecto arrastre* del 14-D de 1988 es concluyente– se trata de una situación no real, en términos históricos a medio y largo plazo.

Veamos. Hasta 1990 no se recuperara el nivel de 1982, cuando a partir de entonces se incrementa a un ritmo de un punto por año para descender claramente a partir de 1995. Si *temporal* va a ser el incremento de las rentas de trabajo, en gran medida, *engañoso* será su recuperación, pues acometidas las políticas de ajuste –tanto las de los años ochenta como de los noventa– este mismo indicador no recuperará, en adelante, ni su capacidad de crecimiento de los setenta ni así su capacidad de arrastre en el conjunto del VAB. De este modo, el impacto que tendrán las políticas liberales implantadas condicionarán, en adelante, las posiciones de fuerza de cada parte. Otro tanto cabe decir de los datos de la *Tabla 95* cuando se examina la evolución de la remuneración de los asalariados y del EBE sobre el PIB en términos porcentuales. Aquí los efectos de la estrategia de la modernización se muestran todavía más contundentes, pues la remuneración de los asalariados sobre el PIB nunca llegará a recuperar el nivel de 1982¹⁸⁸.

Los anteriores datos se complementan en un mismo sentido, cuando se aborda la evolución ajustada de los salarios en el PIB, y que se obtiene del promedio de la remuneración de cada persona empleada como porcentaje del PIB al coste de los factores, tal y como se presenta en la *Tabla 97*. Igualmente todos y cada uno de los indicadores avanzan en la dirección apuntada [consúltense en el “anexo” la *Tabla 95*, la *Tabla 96* y la *Tabla 97*].

Por concluir con una valoración teórica/empírica sobre esta relación conflictiva y clave para examinar uno de los aspectos centrales de los regímenes de mercado –sobre la que se volverá a profundizar más adelante– Rafael Muñoz de Bustillo apuntó en su día un conjunto de valoraciones a tener muy presentes en relación al incremento del EBE en detrimento de las rentas de trabajo:

«1) La existencia de un fuerte proceso tendencial de cambio estructural a favor de las ocupaciones del sector terciario, con una mayor presencia de puesto de trabajo de menor productividad [...] y, *caeteris paribus*, con menos salarios [...]. 2) Recomposición de la estructura intrasectorial a favor de las categorías altas y bajas como respuesta de las empresas ante las nuevas presiones competitivas de los 80 y resultado del cambio tecnológico que, en muchos casos, elimina la gradación de cualificaciones [...]. 3) Indudablemente, el aumento del EBE también responde a factores de oferta de trabajo, como el incremento de la población activa, en gran parte por incorporación de la mujer al mercado de trabajo, en un contexto de crecimiento de la productividad en el sector industrial y atonía de la demanda efectiva»¹⁸⁹.

8.3. El «precio» de la modernización: los costes sociales y humanos

El objetivo de la financiación y del saneamiento de las cuentas públicas así como la propia obtención de liquidez del *Sistema*, se terminó por constituir para los ejecutivos socialistas en una dura batalla contra la propia realidad económica imperante. La *ortodoxia* seguida en este campo fue prácticamente total. La posibilidad de articular una línea de actuación de tipo socialdemócrata resultó inviable, en el preciso momento en que se había priorizado las otras dos líneas de actuación de la estrategia de la modernización ya examinadas.

¹⁸⁸ Un hecho histórico apuntado en no pocos estudios que han tendido a considerar este desequilibrio como algo ‘natural’ de los nuevos tiempos. Tan *natural* como la propia existencia del régimen capitalista: «El reparto de ese crecimiento entre capital y trabajo ha ido corrigiendo gradualmente el desequilibrio que existía a principios de la década en beneficio del factor trabajo para favorecer paulatinamente al capital a lo largo de los últimos años». ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*, p. 110.

¹⁸⁹ MUÑOZ DE BUSTILLO, Rafael, “Salarios, desempleo y calidad de empleo” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. Y continuaba indicando: «La combinación de oferta elevada y la demanda y la asimetría negociadora que conlleva, afectará positivamente, en ausencia de mecanismos de protección efectivos como negociación colectiva o existencia de un salario mínimo, al número de EBC». *Ibídem*.

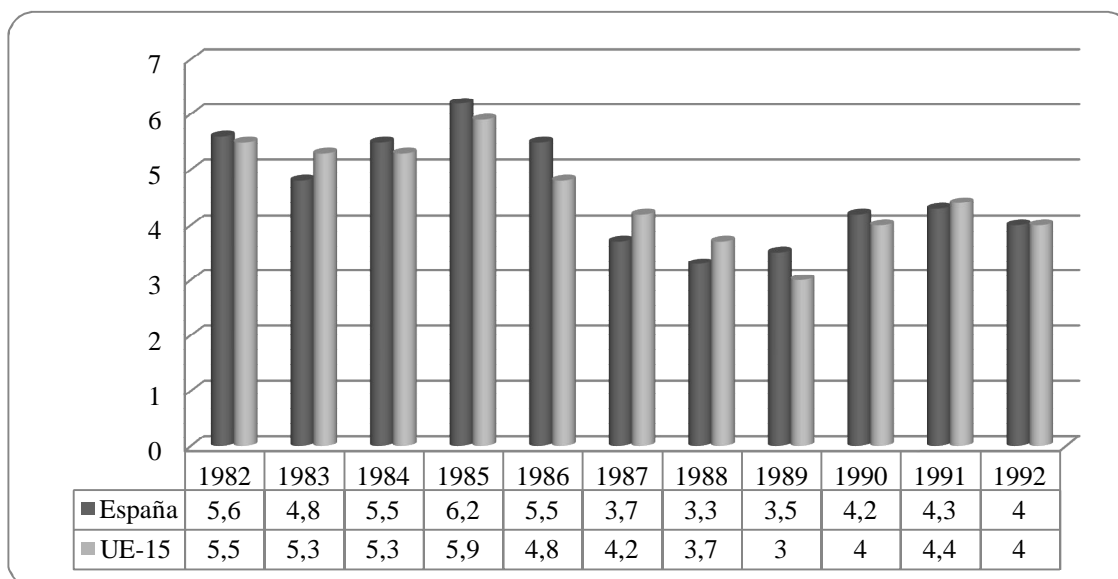
El peso del argumento sobre la “herencia recibida”, sería empleado como *argumento* pero también como mero *pretexto*. Como *argumento*, de cara a plantear la imposibilidad de cualquier otra salida que no fuera la que finalmente se tomó; como *pretexto*, para desarrollar una políticas relacionadas con las cuentas públicas, que, en defensa de la consabida salida a la crisis económica y el posterior mantenimiento del crecimiento económico, implicaría si bien no una *política anti-social*, sí una muy limitada política de gastos sociales. Argumentos y pretextos, por más si bien partían de una realidad incontestable –una grave situación económica de partida– y unas limitaciones de *facto* imperantes –primero, los requisitos de adhesión a la CEE y posteriormente los criterios de Convergencia¹⁹⁰– terminarían a su vez por transformarse en el sustento de un conjunto de políticas no debatibles, no cuestionables.

Una política ortodoxa que tampoco rindió los “frutos” esperados. A saber: una reducción considerable del déficit público¹⁹¹. Un vistazo global certifica como tan sólo durante 1987 y 1988 –una vez más en pleno “boom” económico– España mantendrá un déficit ligeramente inferior al de la media europea, disparándose en los siguientes años, hasta que en 1991 y 1992 vuelva a controlarse a través de las nuevas y duras políticas de ajuste, manteniéndose, en adelante, en cifras similares a los países de la CEE.

¹⁹⁰ Véase, primero, el apartado “6.2.4. El embrujo de la *retórica modernizante*” y, en segundo lugar el apartado “7.1.3. Del «recalentamiento» económico a Maastricht: el *Programa de Convergencia* (1989-1990/1992)”.

¹⁹¹ Junto con lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 86 y nota 245* y en el Capítulo 7, *nota 169*, consúltense, entre otros muchos trabajos, tanto en torno al déficit público como correlativamente sobre el gasto público los siguientes: ESCARIO LATAS, Regina, “Sostenibilidad del déficit público. Un análisis desagregado, 1964-1998”, *Cuadernos Aragoneses de Economía*, vol. XV, nº 1, (2005), pp. 117-136; LÓPEZ i CASASNOVAS, Guillem y GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel, “El gasto público: problemas actuales y perspectivas”, *Papeles de Economía Española*, nº 69, (1996), pp. 2-38; ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago, PRIETO RODRÍGUEZ, Juan y ROMERO JORDÁN, Desiderio, “Principales rasgos de la evolución del gasto público en España en el período 1975-2003” en ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago y SALINAS JIMÉNEZ, Javier (coords.), *El gasto público en la democracia: estudio en el XXV aniversario de la Constitución española de 1978*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2003, pp. 47-75; HERNÁNDEZ GARCÍA, Gloria, “Evolución histórica de la financiación del déficit público”, *Información Comercial Española*, nº 826, (2005), pp. 125-134, dentro del dossier monográfico *La modernización de la economía española (1929-2004)*; BAJO RUBIO, Óscar, “El marco de la política fiscal en España: sostenibilidad del déficit público e implicaciones de la UEM”, *Información Comercial Española*, nº 837, (2007), pp. 57-70, dentro de un número monográfico dedicado a *Política económica en España*; GIL-RUIZ GIL-ESPARZA, Carmen Luisa y IGLESIAS QUINTANA, Jaime, “El gasto público en España en un contexto descentralizado”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 47, (2007), pp. 185-206.

Gráfico 19. Evolución del déficit público en España comparado con la UE-15, 1982-1992 (% del PIB)



Fuente: INE (SEC-95), Eurostat, y elaboración propia.

Tras tales cifras en torno al *déficit público* se encubrían preocupantes datos macroeconómicos, relacionados tanto con la capacidad de ahorro público, la financiación de las administraciones públicas, y lógicamente en lo concerniente con una deuda pública a corto y largo plazo. Factores todos ellos que tienen una fundada relación con la salida “liberal” que se toma¹⁹². Tan sólo entre 1982 y 1985 la deuda pública se incrementaría en un 150% en términos porcentuales. Así al final la “década del cambio” sólo el pago por intereses llegaría al 5,2% del PIB.

Parte de estas mismas consecuencias ya se vieron en el apartado dedicado a analizar los efectos de la liberalización de la economía –*Tabla 33 y Tabla 34*– y el propio refinanciamiento de la estrategia modernizadora. Ahora como se refleja en las *Tablas* siguientes se puede discernir en torno a los siguientes puntos: primero, la capacidad de ahorro público fue extraordinariamente limitada durante este periodo, pues incluso en el lustro de mayor crecimiento al respecto (1987-1992) estas cifras rara vez superaron el 2% del PIB¹⁹³. Evolución que afectó a la capacidad de financiación de las propias administraciones públicas. Si exceptuamos el año 1991, el resto del periodo presentan cifras negativas de en torno al -3% al -5%. Más aún, porque de una deuda pública del 25,6% sobre el PIB para 1982 se terminaría la *década del cambio* con el dato del 46,8% del PIB. Y aunque las mismas, era sensiblemente inferiores a la media europea, terminaría lastrando permanentemente el saldo presupuestario final –véanse la *Tabla 101* y la *Tabla 103*–¹⁹⁴.

¹⁹² Consúltense, RAYMOND BARA, José Luis, “El carácter estructural del déficit presupuestario”, *Papeles de Economía Española*, nº 68, (1996), pp. 192-197

¹⁹³ Junto con lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 154*, entre otras referencias bibliográficas, consúltense: DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M., “El ahorro del sector público en España: 1975-1995” (pp. 100-114); RAYMOND BARA, José Luis y MAULEÓN TORRES, Ignacio, “Ahorro y tipos de interés en los países de la Unión Europea” (pp. 196-214) ambos dentro del dossier monográfico dedicado al respecto por *Papeles de Economía Española*, nº 70, (1997). Y un balance para el conjunto de la década en, ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, “Notas sobre la evolución del Ahorro Nacional Bruto en 1993”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 79, (1993), dentro del número monográfico dedicado a *Los caminos del sector público en 1994*.

¹⁹⁴ Junto con el libro ya citado de, REQUEIJO, Jaime, *España en deuda...*, *op.cit.* véanse sin ánimo ni posibilidad de exhaustividad los siguientes trabajos: CORONA RAMÓN, Juan Francisco, “La ilusión de la deuda pública”, *Cuadernos de Economía*, vol. XIV, nº 41, (1986), pp. 569-575; CANALS

Junto a la política de austeridad llevadas a cabo y que se reflejarían, de forma constante, en los PGE¹⁹⁵, por parte del Gobierno se combinarían un conjunto de medidas para la refinanciación del déficit público. Medidas muchas de ellas innovadoras y que vinieron a afianzar el “actual mercado de la deuda pública con la emisión”¹⁹⁶. Aunque el recurso al Banco de España disminuiría en importancia, el mismo seguiría siendo fundamental durante estos años¹⁹⁷.

De hecho, la permanente emisión de deuda pública en circulación se transformaría en un grave desequilibrio económico llegando a 22.172,30 millones de pesetas para 1992. Un pago de la deuda pública a largo plazo con tasas anuales del crecimiento del interés de más del 10% durante este periodo¹⁹⁸.

MARGALEF, Jordi, “Deuda pública, déficit público y tipos reales de interés”, *Información Comercial Española*, n° 665, (1988), pp. 11-136; VALLE SÁNCHEZ, Victorio, “Deuda pública y déficit público”, *Papeles de Economía Española*, n° 33, (1987), pp. 172-184, dentro de un dossier monográfico dedicado al respecto. Y también: EZQUIAGA, Ignacio, *El mercado español de deuda del Estado: estructura y formación de precios*, Barcelona, Ariel, 1991; RAYMOND BARA, José Luis, “El problema de la sostenibilidad de la deuda pública”, *Perspectivas del Sistema Financiero*, n° 56, (1994), pp. 119-121, dentro de un dossier monográfico dedicado a, *Deuda Pública: una revisión actual*; PRIETO PÉREZ, Eugenio, “El problema de la acumulación de la deuda pública”, *Análisis Financiero*, n° 69, (1996), pp. 78-96; HERNÁNDEZ GARCÍA, Gloria, “La deuda pública en la democracia”, *Papeles de Economía Española*, n° 68, (1996), pp. 214-226, dentro de un dossier monográfico dedicado al respecto; ALONSO GONZÁLEZ Pablo, *La deuda pública: cien preguntas clave y sus respuestas*, Madrid, Dykinson, 1997; ÁLVAREZ CORBACHO, Xoaquín, MONASTERIO ESCUDERO, Carlos y SÁNCHEZ PANDIELLO, Javier, *Déficit y deuda pública en las haciendas territoriales españolas*, Santiago de Compostela, Fundación Caixa Galicia, 1998. Y desde una perspectiva jurídica, HUCHA CELADOR, Fernando de la, “La deuda pública: análisis de su evolución jurídica desde la aprobación de la Constitución de 1978”, *Cuadernos de Derecho Público*, n° 25, (2005), pp. 175-214.

¹⁹⁵ Junto con lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 151* y en el Capítulo 7, *nota 70*, a sumarse entre otras pequeñas notas sobre la política presupuestaria año a año durante la ‘década del cambio’, véanse también una serie de balance globales en: MULAS GRANADOS, Carlos, SALINAS JIMÉNEZ, Javier y ONRUBIA FERNÁNDEZ, Jorge, “Política presupuestaria en España (1978-2003)” en ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago y SALINAS JIMÉNEZ, Javier (coords.), *El gasto público..., op.cit.*, pp. 383-406. Y desde otra perspectiva, FUENTES QUINTANA, Enrique, “La estrategia presupuestaria económica española: entre el drama del déficit público y el deterioro de los servicios públicos”, *Papeles de Economía Española*, n° 37, (1987), pp. 508-530.

¹⁹⁶ RICO BELDA, Paz, “La efectividad de la política fiscal. El caso español”, *Documento de Trabajo. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas*, n° WP-EC 2000-08, (2000), p. 11. Igualmente consúltese sobre este asunto, MALO de MOLINA, José Luis, “Una visión macroeconómica de..., op.cit., y en concreto el epígrafe “3.2. La puesta en marcha de una política monetaria activa”, pp. 12-15

¹⁹⁷ «[D]e forma drástica el recurso al Banco de España, que pasa del 39,3% en 1982 al 7,8% en 1987». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, p. 72, *nota 37*. Sobre la financiación del déficit público y el papel del Banco de España consúltense, entre otros trabajos, el de, SÁEZ PÉREZ de la TORRES, Federico J., “El funcionamiento del mercado de deuda pública anotada en España”, *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, n° 9212, (1992).

¹⁹⁸ Consúltese la aportación de, RICO BELDA, Paz, “Determinantes de la estructura temporal de los tipos de interés de la deuda pública”, *Documento de Trabajo. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas*, n° 96-01, (1996), junto con, MARTÍNEZ BRETÓN, M^a Jesús y MARTÍNEZ DORESTE, M^a del Pino, *Financiación del déficit público en España y nuevos mercados financieros*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1992. Y por último, BALLABRIGA, Fernando C. y SEBASTIÁN, Miguel, “Déficit público y tipos de interés en España en la economía española”, *Documento de Trabajo. Servicios de Estudios del Banco de España*, n° 9220, (1992), y el ya citado de, RICO BELDA, Paz, “La efectividad de..., op.cit., quien a través de diferentes etapas cronológicas –1982/1986, 1987/1989 y 1990-1997– examina toda la normativa y actuaciones acerca del papel del Banco de España en este campo con abundante bibliografía especializada.

En este campo, la situación de partida y de llegada es concluyente: en 1982, a pesar de la grave situación económica del país, el interés de la deuda tan sólo constituía el 0,6% del PIB, para en años posteriores verse incrementada rápidamente, y en concreto, durante los años de mayor crecimiento con cifras cercanas o superiores al citado 4% del PIB. Expresado en miles de millones de pesetas se pasaría de 79,9 para el primer año a 1.999,70 para el último. Es decir, el Estado no sólo tenía una mayor deuda pública sino que el interés pagado iría creciendo sobresalientemente, lo que terminaría, al mismo tiempo, por lastrar la credibilidad financiera del país.

¿Insuficiencia o incapacidad de las medidas adoptadas? Probablemente una combinación de ambas. En cualquier caso, la situación expuesta detalla una muy marcada política de endeudamiento en una dirección totalmente alejada de los postulados socialdemócratas. Es así, por la sencilla razón, como se ha advertido en líneas anteriores, de que las prioridades presupuestarias tuvieron por gran objetivo la financiación de una estrategia de re-acumulación del modelo capitalista español como base del futuro motor económico del país [consúltense en el “anexo” la *Tabla 98*, la *Tabla 99*, la *Tabla 100*, la *Tabla 101*, la *Tabla 102*, la *Tabla 103* y la *Tabla 104*]. Como apuntó el propio socialista Francisco Fernández Marugán:

«Quizá el resultado más decepcionante que se alcanzó fue el del déficit público que continuó creciendo, esta vez como consecuencia de la elevación de los gastos financieros, ya que se había optado por cubrir el saldo entre gastos e ingresos emitiendo deuda y renunciando a su monetarización»¹⁹⁹.

Por lo demás, el “tono militante” cuando no “partidista” de los escasos estudios historiográficos, poco o nada han ayudado, de cara a la elaboración de un relato sosegado y global sobre este tiempo. Lo mismo puede decirse del resto de los exámenes sociológicos, politológicos y, claro está, económicos... Así han prevalecido los posicionamientos políticos-personales en una inmensa mayoría. Unos posicionamientos, que, o bien, a través de interpretaciones cuando menos cuestionables en lo académico, o bien, a través de la instrumentalización de los datos macroeconómicos, han venido a “enjuiciar” más que a *examinar* este tiempo. Lo anterior tiene su justa correspondencia con dos asuntos fundamentales: la política de presión fiscal y la política social.

En ambos casos, el *consenso* académico mayoritario ha resaltado dichas cuestiones para explicar, justificar y/o legitimar el “carácter progresista” de los gabinetes socialistas. Por otra parte, la consolidación del sistema democrático, la entrada en la hoy UE, el inicio de la construcción del Estado de las Autonomías u otros asuntos no menores como la normalización de las relaciones con las Fuerzas Armadas, han sido registrados como los grandes “conquistas” de dichos ejecutivos. Obviándose con la misma intensidad relatora otras tantas políticas, de carácter socioeconómico en su mayoría, que muy difícilmente pueden ser tildadas ya no de izquierdas, socialdemócratas sino a lo sumo de “progresistas”.

Al igual que a cada uno de los temas expuestos en páginas anteriores, pueden contraponerse varios puntos de objeción –el presidencialismo del propio González, los casos de corrupción, los costes sociales de la rápida carrera por la europeización, los desequilibrios entre las Autonomías, las tensiones y tendencias antidemocráticas dentro del Ejército...– lo mismo sucede con la política fiscal y la política social. Y es así por muchos motivos: primero, porque frente a los análisis excesivamente *triunfalistas*, se ha tendido a obviar la precaria situación de partida, y por tanto, el amplio margen de mejora en ambos aspectos ante la inexistencia o ineficacia de las políticas anteriores; segundo, el tantas veces citado *salto adelante* es de nuevo cuando menos cuestionable cuando se tiende a comparar el caso español con los países del entorno. Ejercicio académico de mínimos si no se quiere realizar una hagiografía; y, tercero, frente a las visiones cortoplacistas que normalmente se limitan a presentar los datos en términos

¹⁹⁹ FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del..., op.cit.*, p. 175.

brutos, y que sólo hablan, en la práctica, de cifras y más cifras, en el momento en que se valoran éstas a medio y largo plazo, tanto en términos absolutos como relativos, muchos avances quedan coartados por no pocas otras realidades socioeconómicas.

La presión fiscal subiría en el conjunto de la “década del cambio” diez puntos. En concreto pasaría del 30,6% al 40,8% sobre el total del PIB²⁰⁰. Un incremento considerable en un país cuya fiscalidad durante el franquismo, y en menor medida a lo largo de la transición postfranquista, había sido extraordinariamente baja en relación con los países de la CEE y de la OCDE²⁰¹.

El *esfuerzo fiscal*, en este sentido, es innegable. Además se trató de un esfuerzo doble: por un lado, de cara a modernizar y mejorar el sistema contributivo; y segundo, de cara, a mejorar la progresividad del propio sistema. Sin embargo, en un primer análisis, han de resaltarse las siguientes notas en términos globales; a) a pesar del mencionado incremento de la presión fiscal, España a la altura de 1992 seguía estando por debajo cinco puntos de la media de la UE²⁰²; b) la progresividad del sistema y su efecto redistributivo eran cuestionables en su conjunto. Mientras que los impuestos indirectos habían mantenido una tendencia claramente oscilante, en cambio los directos fueron aumentado su peso y cuantía hasta que al final de la citada década venían a representar el 11,1% sobre el PIB, medio punto más que los indirectos; c) por otra parte, las cotizaciones sociales, que partían también desde unos bajos niveles en comparación con los países europeos, mostraron durante estos años un débil crecimiento a la par que los impuestos sobre el capital quedaron en la práctica “congelados” [véanse en el “anexo” la *Tabla 105* y la *Tabla 106*]²⁰³.

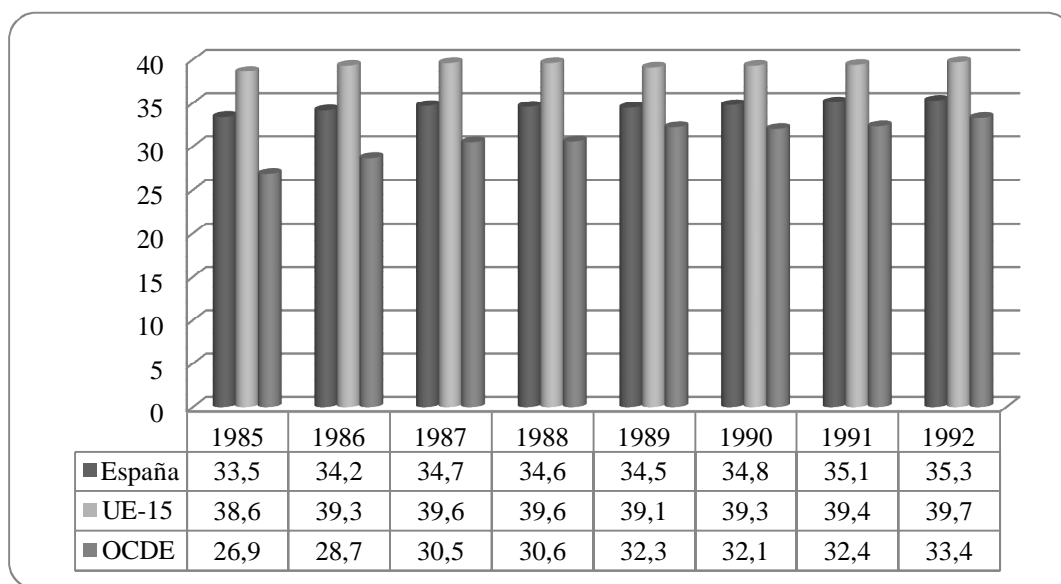
²⁰⁰ En primer lugar consúltese lo apuntado en el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”. A sumarse con las siguientes referencias centrales: ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César, *Sistema tributario español y comparado*, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1992; RÍO OTERO, Coral del, GAGO RODRÍGUEZ, Alberto, CANTÓ SÁNCHEZ, Olga y GRADÍN LAGO, Carlos, “La política fiscal en España durante el período 1982-1996”, *Hacienda Pública Española*, nº Extra 2002, (2000), pp. 253-258, dentro del dossier monográfico, *Historia de la Hacienda en el siglo XX*; así como el aclaratorio trabajo de, CASTELLS i OLIVERES, Antoni [et al.], *Una alternativa fiscal para España*, Madrid, Exlibris / Fundación Alternativas, [2002].

²⁰¹ Otros muchos autores no comporten esta visión. A modo de ejemplo: «Aunque la presión fiscal parece ser similar o inferior a la de otros países europeos, probablemente sea superior si tenemos en cuenta la renta per cápita española. Dado que esta última es mucho menor en España que en los países más avanzados y que, por lo tanto, su capacidad para financiar el consumo y el ahorro es presumiblemente menor, la detracción que sufren los contribuyentes españoles resulta ser superior a la de otros países». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 183. Una visión de este proceso desde el Gobierno en, BORRELL, José, “Economía y fiscalidad en Europa”, *Papeles de Economía Española*, nº 41, (1989), pp. 91-101. Véanse también: ALVAREZ VILLAMARÍN, José Carlos y GAGO GONZÁLEZ, Alberto “Hechos y tendencias de la reforma fiscal en los países de la OCDE (1980-1990)”, *Hacienda Pública Española*, nº 134, (1995), pp. 73-91; y, MARÍN ARCAS, José, “El proceso de consolidación fiscal en Europa. Consecuencias para los antiguos y los nuevos socios”, *Papeles de Economía Española*, nº 103, (2005), pp. 245-259, dentro de un dossier monográfico dedicado a *La nueva Unión Europea*.

²⁰² Como señalaría Charles Powell: «A pesar de que en 1991 la presión fiscal en España era todavía la segunda más baja de la Comunidad Europea, el aumento de la misma entre 1980 y 1992 fue de un 48%, el incremento más elevado registrado en Europa». POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 452.

²⁰³ Primero, en el Capítulo 6 consúltense *nota 231* y *nota 232*. De cara al tema de las cotizaciones sociales entre otros muchos trabajos académicos: SANZ SANZ, José Félix y GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel, “La fiscalidad sobre el factor trabajo”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25-26, (1994), pp. 144-160, dentro del dossier dedicado a *El coste del factor trabajo*; CENTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, *Cotización, salario y jornada de trabajo*, Madrid, Centro de Estudios Financieros, 1992; COLINA ROBLEDO, Antonio, *La cotización de las empresas a la Seguridad Social*, Valencia, CISS, 1998; GÓMEZ GÓMEZ-PLANA, Antonio, “Incidencia de las cotizaciones sociales en el mercado de trabajo español”, *Información Económica Española*, nº 837, (2007), pp. 139-156. De forma mucho más detenida, MELGUIZO, Ángel, *La incidencia económica de las cotizaciones sociales en España*,

Gráfico 20. Evolución de la presión fiscal en España, en la UE-15 y en los países de la OCDE, 1985-1992 (en % del PIB)



Fuente: OCDE, *Revenue Statistics*, y elaboración propia.

Al principio de este apartado hacíamos hincapié en el peso de la economía sumergida – consúltense, de nuevo, la *Tabla 2* y la *Tabla 3*–. Un peso del sector informal constituido principalmente por la evasión fiscal de empresarios y las grandes fortunas, y en mucha menor medida atribuible al trabajo asalariado “ilegal” o directamente a un posible fraude generalizado a la Seguridad Social²⁰⁴. Los cálculos manejados hablan no sólo de la instalación de este fenómeno en el seno de la economía, sino de un incremento sostenido en el tiempo hasta llegar a cuotas cercanas del 20% de la riqueza nacional.

Este hecho histórico por sí solo evidencia otra de las limitaciones –¿cabría hablar de *fracaso*? – del esfuerzo en materia fiscal. Una limitación que mucho tiene que ver con la heredada *impunidad* jurídico-legal de la disfrutaron los empresarios y las grandes rentas durante

Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006. De cara a la evolución general sobre los impuestos sobre el capital: PAREDES GÓMEZ, Raquel, “Análisis comparativo del gravamen efectivo sobre la renta empresarial entre países y activos en el contexto de la Unión Europea (2001)”, *Documento de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 30, (2002). Una visión de conjunto de cara a los dos aspectos aquí tratados, SÁNCHEZ TABARÉS, Ramón, “Una visión del papel del Estado en la economía: consideraciones sobre el caso español”, *Cuadernos de Economía*, vol. XVIII, nº 51, (1990), pp. 105-155; y años más tarde consúltase el estado de la cuestión firmado por, MELGUIZO SÁNCHEZ, Ángel, “¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la fiscalidad laboral?: una panorámica de la literatura empírica”, *Hacienda Pública Española*, nº 188, (2009), pp. 125-182. Y para una comparación a nivel internacional, MARTÍNEZ AZUAR, Juan Antonio y MARTÍNEZ SERRANO, Alicia, “Las cotizaciones a la Seguridad Social en los países de la Unión Europea”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 34, (2002), pp. 169-172.

²⁰⁴ Según el siempre citado estudio de *Las condiciones de vida y trabajo en España* de los más de dos millones de trabajadores que se estimaban que trabajaban en el mercado informal, cerca de la mitad en 1986 declaraban que cobraban menos de 24.000 pesetas mensuales. Lo cual puede ofrecer una idea aproximada ya no de las pésimas condiciones laborales, sino que quien trabajo en este sector no tiende voluntariamente a defraudar. DIOS MURO, Juan de, RAYMOND, José Luis L., TOHARIA, Luis y URIEL, Ezequiel, *Análisis de las condiciones de vida...*, *op.cit.*. Complementétese lo anterior con lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 263*, *nota 264* y *nota 265* en donde se citó un contundente informe de, AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al XXXV Congreso Confederal”, Madrid, 1990, sig. 0067-001.

el anterior régimen político, y la falta de eficacia de las medidas adoptadas con el fin de combatir este “agujero” en las cuentas públicas²⁰⁵. Calculada en más de diez mil millones de pesetas al final de la década, no puede, en caso alguno, minusvalorarse su impacto tanto en la Contabilidad Nacional como en la modernización del sistema tributario general.

Como examinaremos en el apartado siguiente durante los gobiernos socialistas, los límites de la ilegalidad con los de la legalidad fueron más difusos de lo que se puede pensar en un primer instante. Así se legalizaría la contratación temporal por la vía de los hechos, y no mucho tiempos después se legalizaría las ETT's que venían operando fuera del marco jurídico desde hacía años. A pesar de que, en no pocos casos, dichos delitos están tipificados como tales en el Código Penal, excepcionales fueron las ocasiones en que se abrieron los expedientes correspondientes y menos los casos en que se dictaban sentencias condenatorias. Escasas, son las noticias, por ejemplo, de patronos, empresarios, juzgados y encarcelados por incumplir dichas normativas²⁰⁶. Otro tanto sucedió con el fraude fiscal. Se desconoce, desconocemos, que durante la “década del cambio” el caso de cualquier contribuyente que terminara juzgado y también encarcelado por delitos fiscales. Ciertamente casos hubo con algún tipo de impacto mediático –Lola Flores, Pedro Ruiz...– pero insistimos que no se conoce caso concreto de persona encerrada por evadir al fisco²⁰⁷.

Todo lo anterior guarda una estrecha relación con un fenómeno singular –así como enormemente representativo a la par que simbólico– que ocurriría a la altura de junio de 1991. Citar la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 18/1991 no dice mucho en sí mismo²⁰⁸. Ahora bien, esta misma disposición titulada de “Regularización de situaciones tributarias” se interpretó en su día, y aún hoy se interpreta como el ejemplo de lo que puede y debe calificarse como una “amnistía fiscal”²⁰⁹. En enero de 1991 el propio Solchaga declararía que “[e]sta regularización es la última oportunidad en un país serio. Los países serios no hacen regularizaciones”²¹⁰. No sería la última propuesta de *amnistía fiscal* o intento de regularización de los defraudadores a la hacienda pública²¹¹.

²⁰⁵ Véase lo apuntado en el ya citado trabajo de, BARCIELA, Carlos Fernando, “Fraude fiscal y..., *op.cit.*. Y también, VALLEJO POUSSADA, Rafael, “Economía y Hacienda Pública durante los años del desarrollismo, 1959-1975”, *Hacienda Pública Española*, nº Extra 2002, (2000), pp. 191-228, dentro del dossier monográfico, *Historia de la Hacienda en el siglo XX*.

²⁰⁶ Véase en el Capítulo 7, *nota 61 y nota 62*.

²⁰⁷ Véase lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 301*.

²⁰⁸ La cual llevaba por título “Regularización de las situaciones tributarias” y en donde se venía a señalar en su primer punto lo siguiente: «Hasta el 31 de diciembre de 1991 podrán realizarse, siempre que no medie requerimiento o actuación administrativa o judicial en relación con las deudas tributarias de los sujetos pasivos, declaraciones complementarias e ingresos por cualquier concepto tributario devengado con anterioridad a 1 de enero de 1990, con exclusión de las sanciones e intereses de demora que pudieran ser exigibles». Ley 18/1991, de 6 de junio, *del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* [B.O.E. 7 de junio de 1991]. Sobre esta disposición remitimos a, MARTÍNEZ LARGO, Miguel Ángel, “Valoración de las medidas de amnistía fiscal de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, nº 24, (1992), pp. 227-252.

²⁰⁹ Véase, además, del trabajo ya citado de, DÍAZ FUENTES, Daniel, “Fraude y amnistías..., *op.cit.*: PRIETO JANO, M^a José, “Medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias: Las amnistías fiscales”, *Anuales de Estudios Económicos y Empresariales*, nº 9, (1994), pp. 219-242; y en concreto, BANACLOCHE PÉREZ-ROLDÁN, Julio, “¿Amnistía fiscal?”, *Impuestos*, vol. XIV, nº 1, (1998), pp. 9-24. Asimismo véase lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 192*.

²¹⁰ TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 242.

²¹¹ En cada ocasión en que el sistema fiscal se ha modificado a lo largo de todas estas décadas, numerosas han sido las denuncias acerca de sucesivas “amnistías fiscales” encubiertas. Sucedió, por ejemplo, con la aprobación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, *reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva* [B.O.E. 5 de noviembre de 2003] que daría lugar a las conocidas SICAV –véase el trabajo de, MOREIRA PELÁEZ, Jorge, “Novedades fiscales en materia de Instituciones de Inversión

A principios del trayecto socialista Miguel Boyer hablaría sin tapujos de la *moralización general* contra el fraude fiscal²¹². Años antes con la introducción del IRPF en 1978, se llegaría a instalar en la psique colectiva el lema del *spot* publicitario “Hacienda somos todos”²¹³. Eran los tiempos de la configuración de una primera y débil conciencia democrática y también fiscal²¹⁴. Tiempo también de iniciativas singulares como la publicación de la listas de los contribuyentes. Medidas con escaso trayecto. Apenas dos años²¹⁵. Pero lo cierto, es que a la altura de 1991 existían más de seis millones más de declarantes, y con todo el fraude fiscal se había mantenido cuando no se había incrementado²¹⁶. ¿Contradictorio? No.

«A la vuelta de unos pocos ejercicios fiscales, los informes descubrían que el peso del IRPF seguía cayendo sobre las rentas del trabajo; los empresarios continuaban presentando unas bases impositivas irrisorias; los profesionales declaraban rentas a la medida; y los agricultores prácticamente no existían para Hacienda»²¹⁷.

Colectiva”, *Estrategia Financiera*, nº 214, (2005), pp. 66-71–; y más recientemente ha vuelto a suceder cuando se estaba redactando este trabajo. Véase el interesante artículo de, VIÑAS, Jaime, “La amnistía fiscal, un viejo debate que vuelve con la crisis”, *Cinco Días*, 10 de junio de 2010; y, Noticia, “Los inspectores de Hacienda denuncian trato a favor a las fortunas de Suiza”, *ABC*, 24 de junio de 2010. Todo ello por no extendernos mucho más allá de lo que ocurriría en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

²¹² Véase Capítulo 7, *nota 31*.

²¹³ Un ‘slogan’ de gran éxito y que se transformaría en la marca indisoluble de la Agencia Tributaria que, no obstante, daría lugar a múltiples parodias y otras frases más célebres –por ejemplo, sería empleada en numerosas ocasiones como título de películas o capítulos de series de televisión (*Hacienda somos casi todos*, de Mariano Ozores del año 2006) –. Unos años más tarde, en 1987, se cambiaría con poco éxito aquel lema por el de: «Somos un millón más». Sobre este tiempo consúltese el trabajo de, ALVIRA MARTÍN, Francisco Ricardo, “Los españoles después de la reforma fiscal”, *Hacienda Pública Española*, nº 72, (1981), pp. 243-258. Una visión de conjunto en, LAGARES CALVO, Manuel Jesús y CASTELLANO REAL, Francisco, “25 años del IRPF” en *Papeles de Economía Española*, vol. II, nº 100, (2004), pp. 2-16, dentro del dossier monográfico, *25 años de información económica*.

²¹⁴ El propio Enrique Fuentes Quintana, junto con Jaime Requeijo, se mostraría enormemente crítico con los resultados obtenidos en esos primeros años: «Del lado de los ingresos, la reforma tributaria detenía su marcha. No se corrigieron los defectos en que la urgencia en la redacción de las disposiciones había obligado a incurrir en la febril etapa inicial, no se incorporaron tampoco las modificaciones necesarias para completar el cuadro tributario [...]. Tampoco se mejoró ni se potenció la Administración Tributaria, adaptándose algunas medidas que suponían concesiones a distintos y concretos intereses, lo que debilitaba la moral del cumplimiento fiscal, que había sido el principal activo con el que la reforma se inició en 1977». FUENTES QUINTANA, Enrique y REQUEIJO, Jaime, “La larga marcha...”, *op.cit.*, p. 28. Aquí consúltese los datos aportados por, MIGUEL, Iñaki y MIGUEL, Amando de, *Los españoles y los impuestos*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001.

²¹⁵ Véase el Capítulo 7, *nota 39*.

²¹⁶ Véanse también aquí: SUÁREZ PANDIELLO, Javier, SANZO PÉREZ, M^a José y PRIETO RODRÍGUEZ, Juan, “Análisis económico de la actitud hacia el fraude fiscal en España”, *Hacienda Pública Española*, nº 177, (2006), pp. 107-128. Todo ello junto con el estudio de caso de, ÁVILA CANO, Antonio J., SÁNCHEZ MALDONADO, José y AVILÉS ZUGASTI, C. Alicia, *Economía irregular y evasión fiscal: análisis económico y aplicaciones regionales a la economía española*, Málaga, Analistas Económicos de Andalucía, 1997.

²¹⁷ TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, pp. 253. Los autores aportaban los siguientes datos: «Las rentas del trabajo aportan alrededor del 80 por ciento de la recaudación, mientras que los pequeños y medianos empresarios declaraban bases impositivas medias de 583.000 pesetas al año, los profesionales de 887.000 los agricultores de 156.000 pesetas. Para rematar esta situación, el fraude en España estaba tan generalizado que un informe del Instituto de Estudios Fiscales lo calculaba, a finales de 1985, en una cifra semejante a los ingresos recaudados». *Ibíd.*, p. 244. Por su parte, para 1986, Jesús de Miguel calcula una «ocultación estimada [...] por lo menos del 45%». Y manejaba los siguientes datos *oficiales*: «[S]ucedan cosas tan peculiares que las personas asalariadas ganan de media 1,7 millones de pesetas al año, bastante más que los empresarios (que ganan

En Derecho existe normativamente el principio de la “buena fe”²¹⁸. Ahora bien, tanto o más cierto, es que los sistemas tributarios, más allá de sus campañas publicitarias de concienciación, tienen que emplear el aparato represor y vigilante de la Administración Pública, además de dotarse de leyes adecuadas.

Leyes que en España estaban vigentes para la persecución del “delito fiscal” desde 1977 con la modificación del artículo 319 del Código Penal²¹⁹. Y ya en tiempos socialistas a través de la Ley Orgánica 2/1985, de 29 de abril, *de reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública*²²⁰. Pero como en otros ámbitos una cosa es la Ley, y otra muy diferente su aplicación hasta sus últimas consecuencias. Este es el caso de España, en donde la extendida impunidad fiscal seguiría siendo una nota característica del Sistema Tributario hasta el día de hoy²²¹. Con la nota añadida de que ni los medios puestos a disposición ni cierta (débil) voluntad política, aunque siempre cortoplacista, ni las diversas *amnistías fiscales* han podido ofrecer una solución definitiva a este grave problema.

Ya se han constatado dos relevantes hechos –el bajo nivel de presión fiscal y un extendido fraude fiscal–. Dos fenómenos que han tenido un tratamiento desigual, pues si el primero ha sido ampliamente destacado, el segundo ha pasado desapercibido en no pocos estudios generalistas. Igualmente ha de anotarse los diferentes tiempos políticos y económicos que el Gobierno se tomó a la hora de avanzar en la reforma fiscal, aprobada en noviembre de 1977 por el primer Ejecutivo de la UCD²²². Pues mientras que, por ejemplo, en aspectos tan importantes como el IRPF se aplicarían sin demora cuantas medidas tuvieron que adoptarse o sin ir más lejos también en torno al IVA; por el contrario en otros aspectos relacionados, por ejemplo, con el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuestos sobre Sucesiones muchas de las novedades normativas no llegarían hasta principios de los años noventa. Una cuestión que en cualquier caso no puede desligarse del proceso de cesión de competencias a las Comunidades Autónomas en esta materia, así como la posterior aprobación de normativas en cada específica región²²³.

1,2 millones). En 1986 llegan a declarar el 64% de las unidades que debieran, y de las rentas totales sólo se declara el 55% de los ingresos totales. La declaración de rendimientos del trabajo es la más elevada (71%) que la de otros rendimientos (sólo declaran un estimado del 30%)». MIGUEL, Jesús de, *Estructura y cambio...*, *op.cit.*, p. 298. Véase, por último, Capítulo 7, *nota 44*.

²¹⁸ Procedente de la expresión latina ‘bona fides’ constituye un principio general de todos los sistemas de derecho modernos, procedente, a su vez, del derecho romano. Sobre el mismo, PICO i JONAY, Joan, “El principio de buena fe procesal y su fundamento constitucional”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, nº 18, (2005), pp. 15-40, dentro del dossier, *El abuso del proceso: mala fe y fraude de ley procesal*.

²¹⁹ Nos remitimos aquí al Capítulo 7, *nota 52*.

²²⁰ Ley Orgánica 2/1985, de 29 de abril, de *Reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública*. Por lo demás, véase lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 62*.

²²¹ Consúltase lo señalado por la respectada Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en un informe reciente –año 2010– y ello en un momento especialmente duro de la crisis económica por la que atravesaba el país: Noticia, “Los inspectores estiman en 6.000 millones de deuda por delito fiscal”, *El País*, 29 de octubre de 2010. A complementar con lo apuntado en la *nota 201*.

²²² Remitimos, de nuevo, al Capítulo 7 y concretamente a lo apuntado en la *nota 61*. A complementarse con el estudio de, CANSECO CANSECO, José Emilio, *Política fiscal de España: estudio de la política económica pública española desde el Plan de Estabilización*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1978; junto con el trabajo ya citado de, COMÍN, Francisco, “Las aportaciones de...”, *op.cit.*. Por último, uno de los trabajos claves: FUENTES QUINTANA, Enrique, *Hacienda Pública: principios y estructura de la imposición*, Madrid, Ed. Rufino, 1990.

²²³ Consúltase aquí el informe del, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, *La descentralización del gasto Público en España. Periodo 1984-1993*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, 1993. Y asimismo, GARCÍA GRECIANO, Begoña, *Distribución de la renta, crecimiento y convergencia real en España*,

A la hora de examinar el impacto de los impuestos directos se ha de prestar a atención a cuatro de los mismos: el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto General sobre Sucesiones y de Transmisiones Patrimoniales, la contribución General sobre la Renta, y el Impuesto sobre el Patrimonio. En conjunto, los impuestos directos acrecentaron su peso entre 1982 a 1991 en más de un 5,3% en relación al PIB y en cerca de un 80,3% en términos relativos²²⁴. Dejando momentáneamente la cuestión del IRPF y su carácter redistributivo, en relación al impuesto sobre Sociedades ha de señalarse su marcha en paralelo a la *salud* de la economía, por lo menos en cuanto a lo que nos dice en un primer vistazo las estadísticas oficiales²²⁵. La recaudación de este impuesto llegaría a alcanzar el 3% del PIB en 1990 ante el alto nivel declarado del excedente bruto de explotación por parte de las empresas²²⁶.

Sobre este mismo impuesto a lo largo de estos años se operarían todo tipo de deducciones, tanto sobre la base imponible como sobre los beneficios –por ejemplo en 1992 con el *decretazo* se eliminaría la bonificación de 500.000 pesetas en la cuota final por incremento neto de plantilla con cuya medida se había tratado, según el discurso gubernamental, de fomentar el empleo– así como se establecerían diferentes escalas impositivas, aunque el tipo estándar se mantuviera en un 35% cercano o igual a la media europea²²⁷. A partir de 1995 con la nueva normativa que se aprueba se volverán a establecer, en una coyuntura de recuperación económica, generosos beneficios fiscales, hasta el punto de que en términos reales las empresas del país tan sólo tributarían de media un 10% en adelante²²⁸. Es decir, con o sin reforma, la nota

Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997. Y de cara a una visión a largo plazo, ALONSO OLEA, Eduardo J., “La federalización de una Hacienda centralista en un país no federal: España, 1845-2008”, *Economía*, vol. XXXII, nº 46, (2009), pp. 9-44.

²²⁴ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 184. Datos procedentes de la Tabla 6.2. “Evolución de los ingresos de las Administraciones Públicas Españolas, 1982-1991”.

²²⁵ Consúltense aquí los siguientes trabajos específicos sobre la base real imponible del Impuesto de Sociedades: MORENO VALERO, Pablo Antonio, “La armonización del Impuesto sobre Sociedades”, *Boletín Económico del ICE*, nº 2730, (2002), pp. 21-30; ESTEBAN MARINA, Ángel, *Contabilidad y base imponible en el nuevo Impuesto sobre Sociedades*, Madrid, Marcial Pons, 1997; y, RUIZ GONZÁLEZ, Ricardo José y RENEDO, Alberto, “Deducciones y bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades”, *Partida Doble*, nº 107, (2000), pp. 62-75.

²²⁶ Debe asimismo tenerse presente que en 1988 a través de la Ley 39/1988, de 29 de diciembre, *Reguladora de las Haciendas Locales* [B.O.E. 30 de diciembre de 1988], se procedería a crear el Impuesto sobre Actividades Económicas, que venía a sustituir a la licencia fiscal y los tributos municipales.

²²⁷ Para un análisis comparativo a finales de la década de los noventa: ROZAS VALDÉS, José Andrés y ROMÁN GONZÁLEZ, M^a Victoria, “La tributación de las rentas del capital en los Estados miembros de la Comunidad Europea”, *Hacienda Pública Española*, nº 116, (1991), pp. 175-194; y más extensamente en, PAREDES GÓMEZ, Raquel, “La armonización del Impuesto de Sociedades en la C.E.E.: la estrategia española”, *Documento de Trabajo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid*, nº 9301, (1993).

²²⁸ Una ‘dinámica económica’ que ha llegado hasta nuestros días y que tan sólo es ‘noticia’ en momentos de crisis económica, cuando precisamente las necesidades tributarias del Estado son mayores. Primero véase, DÍAZ GARCÍA, Consuelo y MELIS MAYNAR, Francisco (dirs.), *Las empresas españolas en las fuentes tributarias (1991)*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1992. Y segundo, Noticia, “Las empresas apenas pagan impuestos por sus beneficios”, *Público*, 15 de agosto de 2010. En todo caso, y al igual que ha sucedido con las cotizaciones sociales, desde las perspectivas pro-empresariales siempre les ha parecido desmedido la fiscalidad empresarial, eso sí, de nuevo sin aportar dato o cuando se presentan realizando los *oportunos ajustes metodológicos*. Valga un ejemplo: «La carga fiscal que soportan las empresas españolas es superior a la del promedio de los países industrializados. Entre el Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, las empresas españolas soportan un gravamen efectivo superior también al promedio de la Unión Europea. El principal rasgo diferencial de la fiscalidad soportada por las empresas españolas en relación a las competidoras del entorno radica en el mayor peso que representan las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social: mientras que en España equivalían a un 8,8% del PIB en 1991, en la OCDE alcanzaban sólo el 5,4% y en

característica sería un continuado fraude y/o evasión –legal o ilegal– con respecto a este impuesto sobre el capital²²⁹.

Igualmente, desde el mismo Ejecutivo se continuaría durante todo estos años, con una política tendente a reducir –a pesar de lo explicado– las cuantías correspondientes de los empresarios. El argumento institucional que daría pie a este tipo de reducciones sería notablemente diverso pero siempre con un mismo fin: desde el fomento de la contratación, a la mejora de la inversión privada...²³⁰. Es decir, se emplearían un amplio repertorio de argumentos y contraargumentos tanto con fines tributarios a la par que político-económicos²³¹.

En relación al bajo nivel contributivo que se detecta sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, pesaría tanto la *dejadez* política como una normativa claramente desfasada²³². A pesar de su carácter minoritario al estar en la práctica fiscal destinado a las grandes rentas del país –para el periodo estudiado pasaría de 13,5 miles de millones de pesetas a 22 miles de millones de pesetas de recaudación– dentro del sistema fiscal general tenía alto valor simbólico por razones evidentes hasta su supresión en 2008, precisamente, por otro Gobierno socialista²³³. En cualquier caso, no sería hasta la Ley 19/1991, de 6 de junio, *del Impuesto sobre el Patrimonio* cuando se procedería a su reactualización, y por tanto a la clarificación de su

el conjunto de la UE, el 6,4%. El Impuesto sobre Sociedades representaba un 2,7% frente a un 2,8% y un 3% en la OCDE y la UE, respectivamente». ONTIVEROS, Emilio, “Las empresas españolas en el final de siglo” en TUSELL, Javier, LAMO DE ESPINOSA, Emilio y PARDO, Rosa (eds.), *Entre dos siglos...*, *op.cit.*, p. 466.

²²⁹ Como criticara duramente el economista Juan Francisco Martín Seco: «El sistema fiscal, a pesar de los esfuerzos realizados, sigue basándose esencialmente en la imposición indirecta y en las nóminas de los asalariados. Las rentas de capital permanecen casi exentas de tributación. El fraude los profesionales y empresarios individuales, unido a la carencia de potencial recaudatorio del Impuesto de Sociedades, origina que la presión fiscal sobre las empresas españolas sea muy reducida. El Impuesto sobre el Patrimonio posee un mero carácter simbólico, sin virtualidad alguna a la hora de redistribuir la riqueza». MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Comentarios sobre la...”, *op.cit.*, p. 44.

²³⁰ Ley 61/1978, de 27 de diciembre, *del Impuesto sobre Sociedades* [B.O.E. 30 de diciembre de 1978]. Normativa derogada por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, *del Impuesto sobre Sociedades* [B.O.E. 28 de diciembre de 1995]. Sobre su amplia modificación en estos años recurrimos al sintético cuadro de análisis jurídico que proporciona el Boletín Oficial del Estado en su versión electrónica [www.boe.es].

²³¹ Por ejemplo, como recuerda el siempre polémico Carlos Rodríguez Braun: «Por un lado, no se modificó sustancialmente la errónea política de elevadas cotizaciones sociales para las empresas, combinadas con un impuesto de sociedades más bien bajo, en especial por las desgravaciones». Indicando, además, en relación al poderosos sector financiero: «[E]l gobierno favoreció las fusiones, que acogieron a diversos beneficios fiscales –previstos en una legislación ya existente– mediante las abultadas exenciones en el impuesto de sociedades de las plusvalías afloradas por los procesos de fusión». RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “Carlos Solchaga Catalán” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en...*, *op.cit.*, pp. 253 y 250, respectivamente. Otros ejemplos prácticos en, USATEGUI, José M^a, “Subvenciones versus deducciones fiscales en la adopción de innovaciones”, *Hacienda Pública Española*, n^o 116, (1991), pp. 195-202; o, VALLE, Victorio, “Ahorro y fiscalidad en la economía española”, *Papeles de Economía Española*, n^o 48, (1991), pp. 161-169.

²³² En lo básico contenida en la ya citada en varias ocasiones Ley 50/1977, de 14 de noviembre, *medidas fiscales urgentes de reforma fiscal*; y Orden, de 14 de enero de 1978, *por la que se regula el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas* [B.O.E. 17 de enero de 1978].

²³³ No deje de leerse la *Exposición de Motivos* de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, *por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria* [B.O.E. 25 de diciembre de 2008]. Normativa en donde viene a derogarse los artículos 6, 36, 37, 38 y la disposición transitoria, modificándose al mismo tiempo el artículo 33 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, *del Impuesto sobre el Patrimonio* [B.O.E. 7 de junio de 1991]. Por cierto, el mismo día en que se publicaría la Ley 18/1991.

entorno jurídico-normativo²³⁴. Aunque dicho impuesto no dejara de ser minoritario, al mismo tiempo, que estaría sujeto a una escasa vigilancia tributaria, a partir de la aprobación de la citada Ley se acrecentará paulatinamente su nivel de recaudación²³⁵. Sin embargo, aquella reforma tenía otro objeto no explicitado concretamente:

«Tras reconocer que la progresiva internacionalización de la economía española exigía reformas el sistema tributario con la doble finalidad de evitar la salida de capital español y extranjero en beneficio de otros países y de estimular el ahorro privado, el gobierno aprobó una nueva legislación en 1991 que previa una reducción del tipo impositivo máximo en tres puntos en 1992 y en otros dos en 1993, una ligera reducción en el mínimo éxito y un conjunto de medidas para dinamizar determinadas formas de ahorro privado –con un coste total (en términos de ingresos de 391.000 millones de pesetas en 1991 y 1992 [...] 0,75 puntos porcentuales del PIB–»²³⁶.

Una situación similar se producirá con respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales. Por un lado, el Tesoro Público perderá un tiempo valioso para readaptar una legislación que provenía del año 1967²³⁷. 20 años tardará exactamente hasta la promulgación de Ley 29/1987, de 18 de diciembre, *del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*. Normativa en la práctica paralizada hasta la aprobación del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, *por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*²³⁸. Dos medidas esenciales que contribuyeron claramente –véase la *Tabla 109*– al acrecentamiento de la recaudación a través de estas mismas normativas²³⁹.

²³⁴ Ley 19/1991, de 6 de junio, *del Impuesto sobre el Patrimonio*. Sobre dicha normativa consúltese, entre una amplia gama de trabajos, en primer lugar, ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco, *El impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas*, Madrid, Civitas, 1981; y, HERRERO MADARIAGA, Juan, RANCAÑO MARTÍN, Asunción y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Germán, *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio: normativa básica y doctrina administrativa concordada*, Granada, Comares, 1993; y, ARRIBAS LEÓN, Mónica, *El Impuesto sobre el Patrimonio*, Granada, Comares, 2007.

²³⁵ Consúltense los datos ofrecidos en, ENCISO de YZAGUIRRE, Vicente, *Análisis dinámico, comparativo y estructural del comportamiento del Impuesto sobre el Patrimonio neto en España*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2004.

²³⁶ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 182

²³⁷ Decreto 1068/1967, de 6 de abril, *por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley y Tarifas de los Impuestos Generales sobre las Sucesiones y sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados*. Véase también su parcial actualización en, Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, *por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados* [B.O.E. 3 de febrero de 1981].

²³⁸ Respectivamente: Ley 29/1987, de 18 de diciembre, *del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones* [B.O.E. 19 de diciembre de 1987]; Real Decreto 422/1988, de 29 de abril, *por el que se dictan normas provisionales para la gestión y liquidación del Impuesto Sucesiones y Donaciones* [B.O.E. 5 de mayo de 1988]; Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, *por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones* [B.O.E. 16 de noviembre de 1991]. Un artículo, en todo caso, sujeto a numerosas modificaciones a través de las sucesivas leyes presupuestarias de este tiempo y diversas normativas de carácter tributario (por ejemplo, Ley 5/1990 o Ley 31/1990). Véanse los siguientes estudios a nivel jurídico sobre las citadas normativas: PEÑA ALONSO, José Luis, *Las adquisiciones por herencia y donación sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales / Marcial Pons, 1992; CRUZ PADIAL, Ignacio, *Comentario a la Ley y Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones Donaciones*, Málaga, Departamento de Derecho Financiero, Facultad de Derecho, 1994; BERMÚDEZ ODRIOZOLA, Luis, PÉREZ de AYALA BECERRIL, Luís y PÉREZ de AYALA BECERRIL, Miguel, *Comentarios al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*, Valladolid, Lex Nova, 2001.

²³⁹ Consúltense los estudios de caso de, GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, M^a Luisa, *La fiscalidad del patrimonio y de las relaciones familiares económicas familiares*, Navarra, Aranzadi, 2002; BARBERÁN, Miguel Ángel, “Redistribución y progresividad en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: un análisis con datos del panel”, *Hacienda Pública Española*, nº 177, (2006), pp. 25-55. Una

En suma, las tres fuentes de ingresos, hasta ahora citadas, compartían en el campo de la teoría tributaria un valor no tan sólo económico, en tanto las mismas tendían a agravar especialmente las rentas más altas de forma mayoritaria. Un aspecto esencial dentro de los sistemas fiscales modernos, y que se encuentra relacionado directamente con el principio constitucional de “equidad”. Es decir, el principio de “capacidad tributaria” o “contributiva”²⁴⁰. Otro de los muchos campos de batalla político-electoral entre las fuerzas políticas en juego [véanse en el “anexo” la *Tabla 107*, la *Tabla 108*, la *Tabla 109* y la *Tabla 110*].

Pero la *teoría* iba por un lado y la *realidad* por otra. A pesar de los esfuerzos consagrados en esta dirección, el manifiesto carácter injusto del sistema fiscal español no se terminó por corregir como hemos adelantado en más de una ocasión. No sólo por los elementos hasta ahora descritos, y que se comprueban, sin ir más lejos, en el trato secundario dado a los anteriores tres impuestos, sino por algo todavía más sustancial en términos históricos: la aquí sí pesada herencia de hábitos y de prácticas provenientes del franquismo en relación a la contribución general sobre la renta. Una situación que quedó claramente reflejada en el conocido Informe FOESSA sobre *el cambio social en España* de principios de los años ochenta.

«[L]as *Memorias de la reforma tributaria* para 1980 y 1981, publicadas por el Ministerio de Hacienda contienen datos de interés [...] por ofrecer resultados por escalones de renta [...]. Baste decir, en resumen, que la suposición de que los impuestos directos, y particularmente los que tratan la renta de manera sintética, introducirían en el sistema tributario un grado tal de progresividad que no sólo corrigiese la regresividad de los indirectos, sino que configurase al sistema en su conjunto como progresivo, es para nuestro país sumamente problemática. Más bien parece que sucede lo contrario de lo deseable, esto es, que los tipos efectivos resultantes de comparar la cuota líquida con la base liquidable, manifestando con frecuencia un comportamiento errático, apuntan a una pauta de progresividad en los primeros escalones de renta, a la proporcionalidad en los intermedios, y puede que a una franca regresividad en los altos [...]. Dicho con otras palabras: el principio de equidad consistente en hacer tributar de manera desigual a las rentas desiguales [...] no se cumple en nuestro sistema tributario; en él las rentas altas disfrutan de un trato privilegiado, en el sentido de no contribuir con porcentajes progresivamente más elevados de escalón en escalón»²⁴¹.

visión de conjunto, PABLOS ESCOBAR, Laura de, “Incidencia y tipos efectivos del Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 4, (2006). Y por último consúltense los datos ofrecidos por, ARNAÍZ TOVAR, Gonzalo y FERRARI HERRERO, Ignacio, “Impuesto sobre sucesiones: datos para un informe”, *Papeles de Economía Española*, nº 31-31, (1987), pp. 249-264.

²⁴⁰ El principio tributario de Capacidad Contributiva se encuentra asentando en España expresamente a través del artículo 31 de la Constitución dentro del Capítulo segundo. Derechos y libertades y de la Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos: «31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación responderá a los criterios de eficiencia y economía». Nos remitimos aquí al aclaratorio trabajo de, NIETO MONTERO, Juan José, “El principio de capacidad contributiva y su reflejo en la jurisprudencia constitucional”, *Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública*, vol. XLV, nº 238, (1994), pp. 917-962. Véase también lo apuntado en la *nota 222*.

²⁴¹ MURILLO FERROL, Francisco [et al.] (dir.), *Informe sociológico sobre...*, *op.cit.*, vol. II, p. 41. Años más tarde en el conocido como *V Informe FOESSA*, a pesar de la mejora evidente de la situación en este concreto aspecto, se seguía reconociendo como el fraude fiscal representaba, por ejemplo, en 1986 1,3 billones de pesetas. Véase, JUÁREZ, Miguel (dir.), *V Informe Sociológico...*, *op.cit.*. Por su parte, Carles Boix señalaría lo siguiente al respecto: «Miembros del equipo económico del gobierno no dudaron en interpretar este resultado [bajo nivel de presión fiscal] como un fraude fiscal generalizado frente al que el Ministerio de Economía y Hacienda era materialmente incapaz de tomar medidas enérgicas debido a una falsa notaría de recursos materiales y humanos [...]. Más significativo era el hecho de que una comisión designada para examinar el grado de fraude fiscal calculara que en 1980-1982 sólo el 56 por ciento de los contribuyentes estaba presentando declaraciones [...]. Finalmente, el nivel de cumplimiento variaba extraordinariamente entre sectores sociales: el grado de evasión fiscal se estimaba en un tercio de todas las rentas procedentes de sueldos y salarios, pero alcanzaba más de tres cuartas partes de las

Técnicos y políticos socialistas tuvieron claro, desde un primer instante, que la vía más importante para superar esta injusta situación fiscal pasaba, primero, por mejorar el sistema contributivo del IRPF, segundo, por la modificación de los tipos impositivos, y, tercero, por la lucha contra el fraude fiscal.

Más allá de lo relatado en anteriores capítulos, a saber, la inicial voluntad política rápidamente cortocircuitada, junto con la abundante cantidad de recursos humanos y físicos puestos a disposición; también se aprobaría una ingente normativa²⁴². El sistema del IRPF, tal y como se conoce hoy día, tiene su antecedente más inmediato en la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, *del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*²⁴³. Normativa relacionada con la reforma fiscal de un año antes, y que venía a poner fin a la anteriormente conocida Cuota sobre la Renta Global de las Personas Físicas²⁴⁴. Más allá de los *efectos* menores que conllevó la Ley 5/1983, de 29 de junio, *de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria*, este modelo fiscal permanecería inalterado hasta 1985²⁴⁵. El mismo establecía un primer tipo marginal del 15% y un tipo máximo del 65% reducido en la práctica al 40% de la base imponible. En todo caso, como han destacado varios expertos, “las importantes lagunas de la regulación fiscal de los activos financieros, junto con la existencia de importantes debilidades en los sistemas contables de las empresas permitían que muchos rendimientos y ganancias patrimoniales quedaran fuera de la base imponible”²⁴⁶.

Así pues, habría que esperar hasta dos años más tarde con la aprobación de la Ley 48/1985, de 27 de diciembre, *de Reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*, cuando entonces se comience a estructurar más adecuadamente dicho impuesto en una línea de progresividad²⁴⁷. La misma no sólo conllevó que los activos financieros estuvieran bajo el control de la Agencia Tributaria, sino es que además extendió su vigilancia sobre el régimen de tributación de las variaciones patrimoniales. Un primer y claro aviso de la futura persecución del extendido fraude fiscal en este terreno. Igualmente, introdujo una serie de mecanismos para reducir el pago de las rentas obligatorias de los matrimonios. Por lo demás, en cuanto a los tramos se establecerían 34 con un tipo marginal muy reducido del 8% y un máximo del 66% pero limitado, a la hora de la verdad, nuevamente al 46% de la base imponible.

restantes fuentes de ingresos». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, pp. 164-165. Asimismo, y para la situación a principios de los ochenta, ALCAIDE, Julio, “Distribución personal de la renta española en 1980”, *Hacienda Pública Española*, n° 85, (1983), pp. 485-509.

²⁴² Nos remitimos una vez más a lo expuesto en el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985”, y en concreto al relato de por donde transcurrió el primer intento de reforma fiscal de la mano de José V. Sevilla.

²⁴³ Ley 44/1978, de 8 de septiembre, *del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*. Véase también su desarrollo a través del Real Decreto 2879/1978, de 1 de diciembre, *por el que se regulan las retenciones y fraccionamiento del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* [B.O.E. 12 de diciembre de 1978]. E igualmente véase lo apuntado en el Capítulo 7, *nota* 39.

²⁴⁴ Véanse, respectivamente, Decreto 3357/1967, de 23 de diciembre, *por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre las Rentas del Capital* [B.O.E. 4 de marzo de 1968]; y, Decreto 3358/1967, de 23 de diciembre, *por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas* [B.O.E. 18 de marzo de 1967].

²⁴⁵ Ley 5/1983, de 29 de junio, *de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria* [30 de junio de 1983].

²⁴⁶ ONRUBIA FERNÁNDEZ, Jorge, RODADO RUIZ, M^a del Carmen, DIAZ DE SARRALDE, Santiago y PÉREZ LÓPEZ, César, “Progresividad y redistribución a través del IRPF español: Un análisis del bienestar social para el período 1982-1998”, *Documento de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, n° 23, (2006), p. 16.

²⁴⁷ Ley 48/1985, de 27 de diciembre, *de Reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*. Véase aquí también, SOLCHAGA, Carlos, “Discurso parlamentario sobre la reforma del IRPF”, *Hacienda Pública Española*, n° 99, (1986), pp. 205-220.

La aprobación de una conocida y discutida Sentencia del Tribunal Constitucional un 20 de febrero de 1989, en relación a la obligatoriedad de acumulación de las rentas entre los matrimonios –declarada anticonstitucional– obligaría al Gobierno a abordar una modificación de la normativa, a través de dos nuevas leyes que devendrían en esenciales en este ámbito²⁴⁸. Primero, la Ley 20/1989, de 28 de julio, de *adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas*, que tramitada con carácter urgente en las Cortes Generales quedarían reflejados sus efectos en los *Presupuestos Generales* de aquel mismo año como se apuntó previamente²⁴⁹. Su consecuencia más relevante e inmediata sería declarar que la contribución del IRPF habría de ser individual en adelante. Por otro lado, y sin entrar en más disquisiciones jurídico-normativas, el efecto más directo de la citada Ley consistiría en establecer un nuevo sistema de tributación conjunto favoreciendo a aquellos matrimonios con un único preceptor de las rentas. En relación a los tramos se redujeron a la mitad, mientras tanto el tipo marginal impositivo se elevaría hasta el 25% y el máximo en el 56%. Medidas, que en su momento, serían objeto de un largo debate no sólo doctrinal sino también político.

La última modificación de interés dentro de nuestro periodo de estudio sería la Ley 18/1991, de 6 de junio, del *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*²⁵⁰. Vigente hasta 1999 enlaza con buena parte de lo legislado desde 1978²⁵¹. Las modificaciones más sustanciales vendrían, por un lado, por el control que se establecía sobre determinados rendimientos del trabajo, y por otro, a través de la exención de determinadas plusvalías. Asimismo con esta reforma se trataría de atajar con los denominados “gastos deducibles”. No obstante, la no contención cuando no extensión del fraude fiscal, con normativas o sin normativas, terminaría en como la “Agencia Tributaria, después de varios años de notoria y denunciada inseguridad fiscal, acabó con una imagen fuertemente negativa y con la reiteración de un mensaje –la culpa de todo la tiene el fraude fiscal– que cosechó una credibilidad marginal decreciente”²⁵².

En la *Tabla 111* y en el *Gráfico 21* –ambos el “anexo”– puede observarse como durante estos años quedarían establecidos, primero, el tipo marginal máximo del IRPF que bajaría del 66% al 56%, mientras que el tipo marginal mínimo del IRPF oscilaría en estos mismos años entre el 15% al 20% tras el incremento a mediados de los años ochenta del hasta 25%. Del mismo modo, en relación con el nivel de renta a partir de la aplicación del tipo máximo del IPRF, se verifica el objetivo de los técnicos socialistas en ampliar la capacidad recaudatoria, y con ello, la “progresividad” del sistema. Si por ejemplo en 1979 tan sólo tributaban al tipo

²⁴⁸ Véase lo apuntado en el Capítulo 7 *nota 294 y nota 295*.

²⁴⁹ Ley 20/1989, de 28 de julio, de *adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas* [B.O.E. 29 de julio de 1989]. Por lo demás, primero, revítese la bibliografía apuntada en el Capítulo 7, *nota 192*, e igualmente consúltese la intervención en el Club Siglo XXI de, BORRELL, Josep, “Igualdad, libertad y Hacienda Pública”, *Leviatán*, nº 32, (1988), pp. 51-70.

²⁵⁰ Ley 18/1991, de 6 de junio, del *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*. Véase también su desarrollo reglamentario en, Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, *por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifican otras normas tributarias* [B.O.E. 31 de diciembre de 1991]. Sobre esta trascendental normativa junto con toda la bibliografía que hasta el momento se ha citado, consúltese los estudios monográficos de, PONT MESTRES, Magín, “Justificación y alcance de la nueva Ley 18/1991 del IRPF a tenor de su Preámbulo”, *Revista Técnica Tributaria*, nº 4, (1991), p. 11; RUIZ TOLEDANO, José Ignacio, “La tributación de la familia en la vigente Ley 18/1991 y en el Proyecto de Ley del IRPF”, *Quincena Fiscal*, nº 16, (1998), pp. 9-24; y en concreto, DELGADO LOBO, M^a Luisa, *Estado y fiscalidad: los costes de la declaración de la renta en España*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1995.

²⁵¹ Se derogará a través de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, *del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias* [B.O.E. 10 de diciembre de 1998].

²⁵² RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “Carlos Solchaga Catalán” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en..., op.cit.*, p. 255.

máximo las rentas superiores a 274.850 euros, esta renta iría disminuyendo progresivamente: para 1982, 196.284 euros; para 1986, 152.874; o para 1992, 84.806 euros. Además si tenemos presente la variación del tipo medio del IRPF por niveles de renta con poder adquisitivo constante, se coteja, sin problemas, la dirección de la progresividad: para entre 1979 y 1990, las rentas iguales o inferiores a 12.500 euros descenderían -2,53 puntos, mientras que para las rentas iguales o superiores a 100.000 euros se incrementaría en 13,07 puntos. Ahora bien, a lo largo de la década de los noventa (1990-1998) la situación se iría modificando en un sentido menos progresivo. Por un lado, las rentas más bajas variación en 2,20 puntos en positivos mientras que las altas tan sólo lo harían 2,89 puntos²⁵³.

Hasta aquí por el lado de capacidad asignadora. Pero, ¿qué ocurrió por el lado de la capacidad distributiva? Dos circunstancias deben destacarse de forma previa. Primero, el paso de seis a más de doce millones de declarantes en estos diez años –véase la *Tabla 108*–²⁵⁴. Segundo, el incremento de la capacidad recaudatoria. Si en 1982 era tan sólo de 893 mil millones de pesetas, esta cifra se había incrementado para 1987 –fecha en la que ya se puede constatar los efectos de la Ley 48/1985– a 2.328,60 mil millones de pesetas. Finalmente en 1992 lo recaudado por el IRPF constituía uno de los ingresos más importantes de las cuentas públicas: 4.863,60 mil millones de pesetas.

Estos datos positivos por sí mismos no hablan de una mejor distribución y/o progresividad. Ni mucho menos de un “aparato hacendístico eficaz e igualitario” como tanto pregonaron los *académicos* socialistas²⁵⁵. Para contestar a dicho interrogante, tenemos a nuestra disposición un conjunto de estudios que se han propuesto, desde diferentes ópticas económicas, interrogarse por el efecto redistribuidor del IRPF descomponiendo en su conjunto el efecto redistributivo del sistema fiscal²⁵⁶. A partir de los microdatos proporcionados por el Panel de

²⁵³ Consúltense las cifras ofrecidas en, DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M. y CARRASCO CASTILLO, Germán, “La tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España: un análisis de su evolución (1979-1988)”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 135, (1998), pp. 19-26.

²⁵⁴ Asimismo ha de tenerse en cuenta los apuntes de Carles Boix al respecto: «Según estimaciones recientes, tan sólo el 10 por ciento de todo el crecimiento de los ingresos a principios y mediados de la década de los ochenta se debió a la suma de nuevos contribuyentes [...]. La mayor parte del aumento en los ingresos recaudados mediante el impuesto sobre la renta de las personas físicas derivó, en cambio, de una rémora fiscal persistente apenas corregida por el gobierno socialista. Entre 1979 y 1985, la rémora fiscal produjo cerca del 80 por ciento de los nuevos ingresos [...]. Aunque el efecto de la rémora fiscal en el crecimiento de los ingresos descendió hasta algo más del 50 por ciento en los años siguientes, aún siguió siendo la causa más importante de crecimiento de los ingresos por impuestos». BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 165. Sobre esta misma cuestión: DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M., “Una perspectiva sobre la rémora fiscal inflacionaria en el IRPF”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 86, (1994), pp. 88-96, dentro del dossier monográfico dedicado a, *Disenso político y recuperación económica*; IMEDIO OLMEDO, Luis José, “El comportamiento de la recaudación de los impuestos lineales”, *Hacienda Pública Española*, nº 152, (2000), pp. 67-75.

²⁵⁵ TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y id. (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 33. Tampoco se quedaría corto otro economista socialista: «Visto desde la actitud de los contribuyentes, hay que manifestar que los mismos han ido incorporándose ejemplarmente a una práctica tributaria cada vez más moderna». FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en *ibidem*, p. 181.

²⁵⁶ Además de los citados véanse algunos otros trabajos en esta línea. Sin lugar a duda, en primer término, muchos de los trabajos contenidos en el volumen colectivo de, ONRUBIA FERNÁNDEZ, Jorge y SANZ SANZ, José Félix (dirs.), *Redistribución y bienestar a través de la imposición sobre la renta personal*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2003. A destacar dentro de dicha obra: RABADÁN MOSSERAY, Isabel, “Redistribución y flexibilidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España: un ejercicio de simulación del impuesto lineal” (pp. 217-246). Y desde otro enfoque complementario, PASCUAL, Marta y SARABIA, José M^a, “Factores determinantes de la distribución personal de la renta: un estudio empírico a partir del PHOGUE”, *Documentos de Trabajo del Instituto de*

Declarantes que facilita el Instituto de Estudios Fiscales, se han sucedido un conjunto de publicaciones.

Destacaremos dos²⁵⁷. Aunque ambos estudios establecen como fechas fronteras 1982-1998 sus valoraciones siguen siendo de utilidad. El primero, el de Irene Perrote, quien calculó la desigualdad entre las rentas antes y después de impuestos a partir de la utilización de un índice Gini, y comparó sus resultados con la fiscalidad de los países de la OCDE. Más allá de los datos que se exponen en la *Tabla 112*, de cierta complejidad metodológica, nos interesan antes sus claras conclusiones:

«Si comparamos a España con otros países de la OCDE, podemos observar que ésta se encuentra a la cabeza de los países con mayor nivel de desigualdad antes y después de impuestos, sólo superada por el Reino Unido. Sin embargo, el IRPF resulta ser uno de los impuestos sobre la renta más redistributivo, sólo superado por los resultados obtenidos para Suecia, Finlandia e Irlanda. Por último, en cuanto a la IH [Iniquidad Horizontal] se refiere observamos que, estamos entre los países de la OCDE con menor nivel de IH»²⁵⁸.

Aplicando otros barómetros en función de la pregunta a contestar –en este caso, el efecto redistribuidor y progresivo en la estructura del bienestar general a partir de la recaudación por el IRPF– el estudio de Jorge Onrubia Fernández junto con otros, coincide en la valoración anterior. En su síntesis final, declaraban, en primer lugar, como el “IRPF aplicado en España [...] se comporta efectivamente como un tributo progresivo corrigiendo la desigualdad de la renta objeto de gravamen”; y en segundo lugar señalaban como “en lo que respecta a la aportación de los distintos elementos de la estructura del impuesto a su grado de progresividad y a su capacidad redistributiva, el estudio pone de manifiesto que las sucesivas reformas habidas entre 1979 y 1998 han concentrado en la progresividad de la tarifa el poder redistributivo, hasta constituir prácticamente más del 90% del mismo”. Y concluían interrogándose: “¿Ha mejorado el bienestar social la exigencia del IRPF en el amplio periodo estudio? Del análisis realizado se desprendían una respuesta claramente afirmativa”²⁵⁹.

En suma, se confirma la hipótesis de cómo los gobiernos socialistas incrementaron la progresividad del IRPF en un sentido distributivo. Ahora bien, más allá de las deficiencias y

Estudios Fiscales, nº 15, (2004). A nivel general: ÁLVAREZ ALEDO, Carlos [et a.], *La distribución funcional...*, *op.cit.*.

²⁵⁷ Nos referimos a la base de microdatos anonimizados titulada “Panel de Renta (Declarantes del IRPF)”, que comprenden los años 1982 a 1998 y para cuyo acceso completo debe solicitarse la correspondiente petición al Instituto de Estudios Fiscales [www.ief.es/recursos/estadisticas/fuentes_tributarias.aspx]. Sobre su empleo metodológico, AYALA CAÑÓN, Luis, ONRUBIA FERNÁNDEZ, Jorge y RUIZ-HUERTA CARBONELL, Jesús, “Modelos de microsimulación: aplicaciones a partir del Panel de Declarantes por IRPF del Instituto de Estudios Fiscales”, *Cuadernos Económicos de ICE*, nº 68, (2004), dentro del dossier monográfico, *Modelos de microsimulación*.

²⁵⁸ PERROTE, Isabel, “Redistribución en la imposición sobre la renta personal: el caso español” en *XIV Encuentro de Economía Pública: políticas públicas y reformas fiscales*, Santander, 2007, pp. 18 y 19. Por su parte Jesús de Miguel señalaría lo siguiente en línea con lo previamente expresado: «Se observa que los datos del IRPF suponen un incremento constante de la desigualdad económica en España. Entre 1979 y 1990 el índice de Gini aumenta un 30% (pasa de 0,30 a 0,42) en la concentración de la renta antes del IRPF, y todavía un 18% de incremento de desigualdad después del IRPF, con un índice Gini que crece de 0,31 a 0,37. El IRPF tiene pues un efecto redistribuidor pequeño pero efecto, aunque la desigualdad no hace más que aumentar». MIGUEL, Jesús de, *Estructura y cambio...*, *op.cit.*, p. 298. En esta línea consúltese los datos y completos cuadros estadísticos aportados por, NAVARRO, Manuel, “Desigualdad económica” en CAMPO, Salustiano del (coord.), *Tendencias sociales en...*, *op.cit.*, vol. II, pp. 547-564. Contrástese, en todo caso, esta visión con la presentada por, GONZÁLEZ CALVET, Josep, “La política fiscal: expansión con escasos impactos redistributivos” en GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), *Políticas públicas en...*, *op.cit.*, pp. 55-78.

²⁵⁹ ONRUBIA FERNÁNDEZ, Jorge, RODADO RUIZ, M^a del Carmen, DIAZ DE SARRALDE, Santiago y PÉREZ LÓPEZ, César, “Progresividad y redistribución...”, *op.cit.*, p. 55.

limitaciones comentadas sobre el sistema fiscal, queda también claro que se trató de un modelo insuficiente para corregir otras tantas desigualdades fiscales procedentes del anterior sistema contributivo. Se avanzó, en la práctica, en una sola dirección descartando otras posibles medidas redistributivas. En dicha situación, pesaron no pocos elementos de valoración político-electoral. Aunque durante los años ochenta en Europa todavía no estaba tan generalizado, e inclusive aceptado, el *nuevo consenso* clásico sobre el “ataque” a los impuestos directos y concretamente sobre el IRPF, la prudencia así como el materialismo político tan propio de los socialistas, les llevaría a constreñir otras posibles actuaciones. Pero también pesaron aquí otros aspectos relacionados con la estrategia de la modernización, de cara a no erosionar el poder económico del capital privado una vez que consolidada la operación de la reestructuración del capitalismo nacional [véanse en el “anexo” la *Tabla 111* y *Tabla 112* así como el *Gráfico 21*, el *Gráfico 22*, el *Gráfico 23* y el *Gráfico 24*].

Nos resta por plantear una breve valoración en torno al impacto y la distribución de los impuestos directos²⁶⁰. Un asunto de calado cuando se tiene presente la importancia del consumo privado en el conjunto del PIB en España. A diferencia del notable incremento de los impuestos directos sobre las cuentas públicas, estos últimos tendrían un menor crecimiento. Así entre 1982 a 1991 incrementarían su peso en 2,0% sobre el PIB y en un 25,3 en términos relativos²⁶¹.

A nivel normativo, sin duda alguna, el aspecto más destacado será la creación del IVA, que desde ese mismo momento constituye la base principal del sistema impositivo indirecto²⁶². Legislado en base a las condiciones impuesta por la adhesión con la CEE²⁶³, sustituiría al Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) –de escaso peso recaudatorio– y con él

²⁶⁰ Visiones generales, junto con las apuntadas, en, ABADÍA, Antonio, “Evolución del tipo efectivo en los impuestos directos”, *Investigaciones Económicas*, vol. XIII, nº 1, (1989), pp. 45-66; PÉREZ DE AYALA, José Luis, “La distinción entre los impuestos directos en virtud de sus diversos efectos de «percusión» y «sustitución»”, *Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública*, vol. XXIX, nº 200, (1989), pp. 285-296; CORAL GUERRERO, Luis, “Sistema básico de la imposición directa”, *Cuadernos de Estudios Empresariales*, nº 11, (2001), pp. 87-116. Teniendo por lo demás presente las aportaciones del libro básico de, ALBI IBÁÑEZ, Emilio y GARCÍA ARIZNAVARRETA, José Luis, *Sistema fiscal española*, 12ª ed., Barcelona, Ariel, 1997.

²⁶¹ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*, p. 184. Datos procedentes de la Tabla 6.2. “Evolución de los ingresos de las Administraciones Públicas Españolas, 1982-1991”.

²⁶² La normativa central se encuentra regulada para este tiempo en, Ley 30/1985, de 2 de agosto, *del Impuesto sobre el Valor Añadido* [B.O.E. 9 de junio de 1985]; junto con, Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, *por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido* [B.O.E. 31 de octubre de 1985]. Normativa vigente hasta la aprobación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, *del Impuesto sobre el Valor Añadido* [B.O.E. 29 de diciembre de 1992]. En primer término, consúltese el valioso dossier monográfico sobre el sistema fiscal de, *Papeles de Economía Española*, nº 30-31, (1987) con artículos de notables interés como los que se destacan a continuación: LAURÉ, Maurice, “Breve historia del nacimiento del IVA” (pp. 31-36); LASHERAS MERINO, Miguel Ángel, “La implantación del IVA en España: resultados y perspectivas” (pp. 265-271); o, BERRUGUETE REVUELTA, Francisco Javier, “Un año de experiencia en la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido” (pp. 272-278). Referencias básicas para seguir la implantación y valor económico del IVA en España en las siguientes obras, todo ello dentro de una más amplia bibliografía: LÓPEZ ARRIBA y GUERRI, Alberto Luis, *El Impuesto sobre el Valor Añadido*, Madrid, Edilex, 1986; y en, ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César, *El Impuesto sobre el Valor Añadido: análisis y comentarios*, Madrid, Deusto, 1994. Todo ello junto con el informe de, MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIENDA. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA, *Un año de IVA: su implantación en España*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Gestión Tributaria, 1987.

²⁶³ Véase aquí, VEGA MOCOROA, Isabel, *La armonización del IVA y el logro del mercado interior*, Valladolid, Lex Nova, 1991.

también desaparecía el Impuesto sobre el Lujo²⁶⁴. Todo ello a pesar de que no dejara de ser cuando menos contradictorio que un Gobierno socialista se viera obligado, técnicamente, a tomar tal decisión²⁶⁵. Un impuesto este último también menor –el nivel de recaudación no superaría los 200 mil millones pesetas, aunque superior a lo recaudado por el Impuesto sobre el Patrimonio– pero, insistimos aquí, una vez más, cargado de significado político-social.

Tal y como se refleja en la *Tabla 113* tanto el IVA como los Impuestos Especiales sobre el Consumo, constituyen la principal fuente de provisión de ingresos directos durante estos años²⁶⁶. Los restantes, desde el impuesto de emisión y negociación de valores mobiliarios o los referidos al Timbre del Estado –los cuales por cierto tendrán un acusadísimo descenso a nivel recaudatorio en esta etapa– guardan una importancia menor²⁶⁷. Así pues, resulta, en primer lugar, de interés preguntarse por el impacto que tendrá el IVA, tanto a nivel de recaudación en porcentaje del PIB como en relación a sus efectos sobre el consumo real. Todo ello partiendo de dos premisas. La primera del hecho de cómo durante los años ochenta se ha estimado la “ocultación en un 24%” en relación a dicho impuesto²⁶⁸. Segundo, el propio carácter discriminador que tiene cualquier impuesto directo, en relación tanto al nivel del consumo como al nivel de la renta global de un país e igualmente en lo que se refiere a los efectos distributivos del sistema contributivo²⁶⁹.

²⁶⁴ Consúltase la ‘guía’ del, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA, *Del ITE al IVA*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaria General Técnica, 1985.

²⁶⁵ Quedaba así derogado el Real Decreto Legislativo 857/1981, de 27 de marzo, *por el que se aprueba el texto refundido sobre el Impuesto sobre el Lujo*. Consúltase tanto para el ITE con respecto al último impuesto citado en el trabajo de fondo de, GÓMEZ SALA, Jesús Salvador y MORENO DOMÍNGUEZ, M^a Mercedes, “La imposición sobre el consumo y la fiscalidad sobre los turismos. Un análisis comparado”, *Cuadernos de Ciencias Económicas y empresariales. Papeles de trabajo*, n^o 31, (2005), y en concreto su primera parte titulada: “Capítulo 1. La imposición sobre el consumo en España y los países de nuestro entorno” (pp. 5-58).

²⁶⁶ En todo caso, la normativa central para estos años sería la Ley 45/1985, de 23 de diciembre, *de Impuestos especiales* [B.O.E. 24 de diciembre de 1985]. Consúltase su presentación parlamentaria por el propio Miguel Boyer en, CORTES GENERALES, *El impuesto sobre el valor añadido. Proyecto de Ley y memoria*, 1985, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1985. Normativa vigente hasta la aprobación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, *de Impuestos Especiales* [B.O.E. 29 de diciembre de 1992]. Sobre su impacto normativo y económico nos remitimos a, IZQUIERDO, José Félix, TAGUAS, David y MELGUIZO ESTESO, Ángel, “Imposición y precios de consumo”, *Papeles de Economía Española*, n^o 87, (2001), pp. 199-220; y desde una perspectiva exclusivamente jurídica a nivel comparativo a, SOLANA VILLAMOR, Francisco, *La armonización de los elementos estructurales de los impuestos especiales: comentarios a la Directiva 12/1992*, Madrid, Información y Documentación Tributaria, 1992.

²⁶⁷ Véase lo apuntado en la *nota 262*.

²⁶⁸ Un ejemplo, lo suficientemente ilustrativo: «A cada paso saltan en los medios informativos los multimillonarios fraudes del IVA y en el último año un escándalo mayúsculo: más de 600 empresas públicas y privadas compraban facturas falsas a otras 52 empresas piratas para defraudar a Hacienda. El Juzgado de Delitos Monetarios se hizo cargo del caso, cuyo fraude puede alcanzar los 150.000 millones de pesetas». DUQUE, José Carlos, “Documentación. Una cierta decepción” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista...*, *op.cit.*, p. 305. Consúltense también los trabajos específicos de, DÍAZ, A. y ROMERO, Desiderio, “Evaluación del fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido”, *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, n^o 8, (1993); GÓMEZ DE ENTERRÍA, MELIS, Francisco y ROMERO, Desiderio, “Evaluación del cumplimiento en el IVA: Revisión de las estimaciones. Años 1990 a 1994”, *Documento de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, n^o 18, (1998).

²⁶⁹ Sobre esto último, SÁNCHEZ MALDONADO, José y MOLINA MORALES, Agustín, “Efectos de la armonización del IVA en la distribución de la carga fiscal en España”, *Hacienda Pública Española*, n^o 116, (1991), pp. 137-144.

La contextualización de la coyuntura en que se implantará el IVA resulta relevante. Durante los años 1985 y 1986 su futura aprobación acapararía una amplia repercusión mediática, acompañada de singulares campañas informativas sobre el asunto –la más conocida sería la de “El IVA no sube los precios” –²⁷⁰. Más allá de los debates de poco rigor, en todo caso, prevaleció en aquel momento la sensación colectiva de “desinformación” como destacaría en un artículo en *El País* el periodista y escritor Ricardo Lezcano:

«El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ha entrado por la puerta grande en el inagotable verano de comicidad que parece manar de la actuación gubernamental, y para el autor de este artículo jamás ha existido un tributo que fuera más festivamente arrastrado por las plazas públicas del espectáculo. Pero la desinformación sobre la aplicación concreta del impuesto, especialmente entre los comerciantes, ha originado subida de precios y una psicosis inflacionista poco recomendable»²⁷¹.

Una comicidad que como reflejaría el grupo *La Trinca* –“Hay que el IVA ya está aquí/ Hay que el IVA ya llegó/ Es moderno porque sí/ Y en Europa hace furor/ Como somos de los pocos de los que lo saben calcular si nos prestas atención te lo vamos a explicar...”²⁷²– evidenciaba, más allá de las notas tan típicas del humor hispano, la velocidad con la que sucedían los acontecimientos durante la primera legislatura. Y con ello, el desconcierto generalizado –atribuido desde las instancias oficiosas a simples “choques psicológicos con la nueva realidad”²⁷³– entre la población. A lo que añadía una serie de expectativas pero también de fundados celos ante la inminente entrada en la siempre anhelada Europa²⁷⁴.

Pasado el no fácil periodo de adaptación al IVA, el mismo tendría una relevancia matizable en el cómputo general de los impuestos sobre el consumo. En la *Tabla 115* y en la *Tabla 116* se verifica dicha afirmación. Por ejemplo para 1992 transcurridos ya seis años desde su puesta en marcha, el IVA representaba el 5,6% de la total recaudación de los impuestos sobre el consumo en porcentaje del PIB. A pesar de que no debe minusvalorarse esta cifra, los impuestos sobre Bienes y Servicios o de Producción y Venta eran respectivamente el 9,8% y el 9%. Por otro lado, el IVA representaba para la misma fecha el 16,19% del total de la recaudación de los impuestos sobre el consumo como porcentaje del total de imposición. De nuevo, tanto el impuesto de Bienes y Servicios y Producción de Venta, por no hablar de los Impuestos Generales, eran más importantes a nivel recaudatorio: 28,36% y 26,19%, respectivamente.

A pesar de que el tipo de estándar del IVA se mantendría en unos niveles más bajos que en los países de la OCDE –véanse la *Tabla 111* y la *Tabla 114*– no puede desdeñarse, insistimos, su contribución global a las arcas del Estado. No sólo está detrás de la elevación general de los impuestos sobre el consumo como porcentaje del PIB –que crecería entre 1965 y 2001 un 4,2% mientras que en la OCDE y en la UE sería del 1,8% y del 1,5%, respectivamente– sino es que,

²⁷⁰ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, *El IVA hecho fácil*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General Técnica, 1985. Y también léase la ‘guía’, id., *Impuestos fiscales de Hacienda Pública*, Madrid, Departamento de Difusión y Propaganda”, 1986. Para el desarrollo de la campaña publicitaria y los movimientos internos dentro del Ministerio de Economía, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, op.cit., pp. 118-s.

²⁷¹ LEZCANO, Rafael, “¡IVA 1986! La desinformación en el Impuesto sobre el Valor Añadido”, *El País*, 16 de enero de 1986.

²⁷² Canción *La Trinca*, “El IVA hecho fácil”, 1985.

²⁷³ «En un país que había acumulado un cierto atraso técnico, pero sobre todo, un conjunto de prácticas propias de una economía aislada y poco relevante en la escena internacional, tantos cambios y en tan poco tiempo tenían que producir choques psicológicos y comportamientos un tanto erráticos por parte de aquellos que se resistían a adaptarse a sus consecuencias, lo cual es bastante comprensible». SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, op.cit., p. 42.

²⁷⁴ Consúltase al respecto el retrato ofrecido por, GÓMEZ FUENTES, Ángel, *Así cambiará España. La batalla del Mercado Común*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

además en comparación con la OCDE y la UE-15 tendría un nivel de variación del 17,06% entre 1986-2001, cuando se calcula la evolución del IVA como porcentaje total de imposición²⁷⁵. Cifras superiores al 15,85% de los países de la OCDE y del 13,24% en la UE-15.

En fin, el IVA no escaparía, en adelante, de no pocas batallas político-electorales. En el momento en que se escriben estas líneas de hecho su subida ha generado un prolífico debate sobre la fiscalidad directa del país. Un debate que, con más o menos intensidad, ha estado presente desde su introducción al compás de la entrada en la CEE, y que nos viene a hablar, en resumidas cuentas, de los estrechos márgenes de actuación en esta materia por parte de los diferentes gobiernos del país independientemente de su *color* político [consúltense en el “anexo” la *Tabla 113*, la *Tabla 114*, la *Tabla 115*, la *Tabla 116*, la *Tabla 117*, la *Tabla 118*, la *Tabla 119*, la *Tabla 120*, la *Tabla 121*, la *Tabla 122*, la *Tabla 123* y la *Tabla 124*].

Dentro de este apartado dedicado a las consecuencias económicas y políticas de la lucha contra el *déficit público* por parte de los socialistas; se presentan a continuación unas pequeñas notas sobre la evolución general del gasto público durante la “década del cambio”. Sus cambios, transformaciones, fisionomía, características se han ido desbrozando en no pocos epígrafes²⁷⁶. No obstante, conviene detenerse en una visión global tanto macroeconómica como en términos históricos.

Es, a buen seguro, junto con la línea económica adoptada, el principal punto de discusión a nivel historiográfico y por extensión económico. Existe, al igual que con la política de corte liberal en el terreno económico, un *consenso* bastante amplio en que los gobiernos socialistas se verían impedidos ante la realidad económica de ampliar cuantitativa y cualitativamente el siempre insuficiente Estado del bienestar. Otra de las muchas hipótesis con gran público que, por un lado, no exploran otras posibles líneas de interpretación, ni responden con suficiencia al interrogante central en torno a las causas del tradicional retraso social en España²⁷⁷.

Pero todavía más pues dichos escasos análisis tampoco se han planteado ni se han preocupado por contestar el que quizás sea el interrogante central si atendemos a la política y práctica por los socialistas: ¿sería realmente “instrumental” la política económica desarrollada con el fin de avanzar hacia unos fines sociales de carácter redistribuidor?²⁷⁸

A partir de los datos aquí aportados tanto referentes a la estrategia de la liberalización de la economía, la lucha contra la inflación y el propio déficit público, lo que sobrásale en este campo es una opción política muy concreta que tendió a “sacrificar” el gasto político en aras, según el propio discurso oficial gubernamental, de la eficiencia económica. Lo que hemos

²⁷⁵ Véase aquí el trabajo de, MAYO MORENO, Rafaela, “Análisis redistributivo del IVA: Incidencia de los tipos impositivos”, *Hacienda Pública Española*, nº 132, (1995), pp. 153-189.

²⁷⁶ Véase, al respecto, el apartado “6.2.3. “La ortodoxia por bandera: el *déficit público*”.

²⁷⁷ Consúltense la bibliografía apuntada en la *Presentación*, *nota 127*, Capítulo 2, *nota 241*, Capítulo 6, *nota 12*, *nota 114*, *nota 290*, entre otras. A complementarse con los siguientes e importantes trabajos para este periodo en concreto: GONZÁLEZ TEMPRANO, José Manuel, “Gasto público y crecimiento económico en el Estado del bienestar”, *Hacienda Pública Española*, nº 2 [extraordinario], (1994), dentro del dossier monográfico dedicado a *XXV Aniversario*; y, MORENO FERNÁNDEZ, Luis y PÉREZ YRUELA, Manuel (comps.), *Política social y estado del bienestar*, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1995 [Ponencias del I Seminario Internacional de Política Social “Gumersindo de Azcárate” celebrado en Madrid en 1990].

²⁷⁸ Junto todo lo anteriormente apuntado véase el aclaratorio trabajo de, JIMÉNEZ BUEDO, M^a, *The trade-off between efficiency and equality: the role of an economic idea in the political strategy of social democratic parties*, Tesis Doctoral, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 2005.

denominado como la imposibilidad de la “cuadratura del círculo de la estrategia modernizadora”²⁷⁹.

Lógicamente, la siempre tan citada *cuestión social* ocupó un lugar preferente en la retórica socialista, tanto desde el Gobierno como desde el Partido, describiendo lo que ellos mismos consideraban como un “círculo virtuoso”²⁸⁰. Una retórica sobre el gasto público que mucho tuvo que ver, primero, con la necesidad de legitimación político-social de un Gobierno/Partido autoconsiderado socialdemócrata²⁸¹. Pero al mismo tiempo de cara a atenuar las consecuencias tanto de la crisis económica con la que se inauguraría la época socialista, como los sobrecostos sociales y humanos de la salida “progresista” y “solidaria”. Precisamente, estos dos términos, *progresista* y *solidario*, nos faltarían tampoco en ninguno de los discursos gubernamentales y partidistas al referirse a la cuestión social²⁸².

¿Fue realmente *solidaria* y *progresista* la política socialista en su conjunto? Difícilmente puede ser así calificada en su más amplio sentido. Aunque en este campos nos movemos más en las cifras que en un conjunto de estudios solventes, la bibliografía hasta ahora publicada no ha dejado de poner el acento en las limitaciones de la política social socialista. Y a su vez, a través de sus estrechos márgenes de interpretación, generalmente han dado por válido las razones sobre la que se sustentó el discurso institucional. He aquí uno de los principales ‘lugares comunes’ de este tiempo

Dejando apartadas posibles interpretaciones –tal y como se procedió con respecto al déficit público– trataremos de explorar esta trascendental cuestión con las bases estadísticas disponibles. Cifras que varían según procedan del INE o del Eurostat. Si tomamos por válidas estas últimas, en términos netos se redujo el diferencial del gasto público entre España y la UE de trece puntos a seis puntos en relación al PIB. Ahora bien, el 40,2% del gasto público sobre el PIB en España para 1992, según Eurostat –la Contabilidad Nacional ofrece otros datos más elevados, véase aquí la *Tabla 125* entre otras– no refleja con suficiente claridad ni precisión la posición social del país en el entorno europeo.

²⁷⁹ De interés resultan las hipótesis manejadas por James Petras: «Los ‘socialistas’ cayeron en la trampa del mercado en gran parte porque los equipos económicos [a quienes] se les había asignado la dirección de las economías procedían de escuelas de economía neoclásica. El ascenso de los tecnócratas se vio acompañado por un trasvase horizontal de la ideología de ‘libre mercado’ desde los países hegemónicos del norte de Europa. Esta transferencia ideológica trajo consigo efectos especialmente perniciosos porque, a diferencia del norte de Europa, no había sido precedida por la construcción de una sólida red de bienestar social. Por lo tanto cuando se llevaron a cabo restricciones sociales en el Sur, afectaron a clases que ya estaban viviendo en condiciones precarias; no se redujeron los programas escalonadamente, lo hicieron violentamente». PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, op.cit., p. 61.

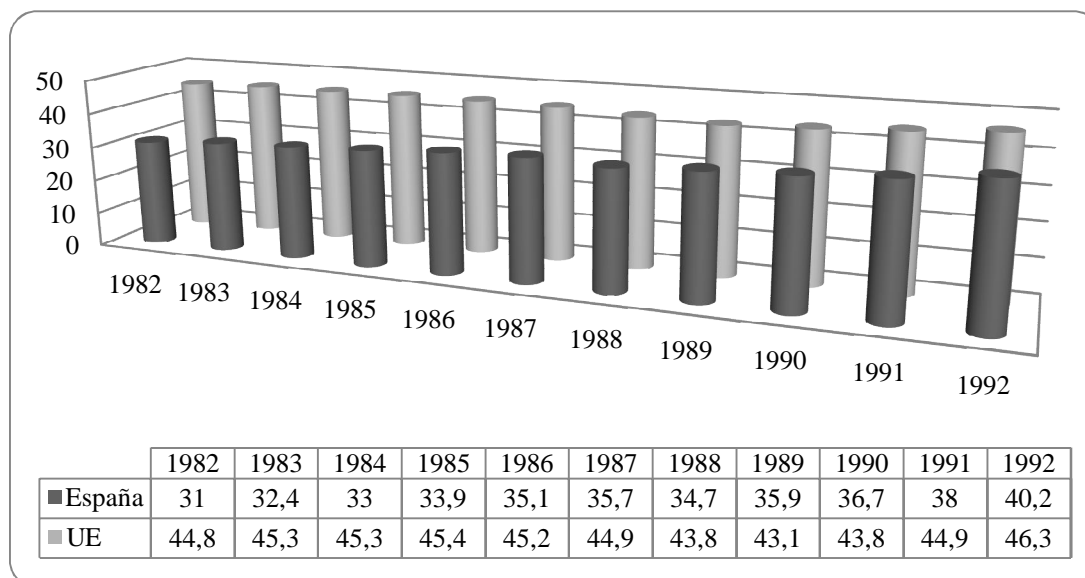
²⁸⁰ AHFPI, PSOE-CE, “Memoria Política y de Gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso. Madrid 9-11 Nov. 1990”, Madrid, noviembre de 1990, sig. Fc 912, p. 21. Complementéase lo anterior con los informes monográficos de mediados de los años ochentas procedentes de la propia organización: AHFPI, PSOE, Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, “La política económica de los socialistas: balance de un ajuste solidario”, Madrid, 1986, sig. B 3482; y, AHFPI, PSOE-CEF, “La política social (1983-1987)”, Madrid, abril de 1988, sig. Fc 6817. Asimismo véanse los trabajos colectivos contenidos en, FUNDACIÓN JAIME VERA, *Compromiso de progreso*, Madrid, Fundación Jaime Vera, 1993. Y a nivel institucional consúltese la auto-propaganda de, MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, *Solidaridad e igualdad de oportunidades: una política social integrada*, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1989.

²⁸¹ Véase aquí la publicación de una tesis ya citada en más de una ocasión: CALZADA GUTIÉRREZ, Inés, *La tela que nos teje: un estudio comparado de las bases que sustentan la legitimidad de las políticas sociales*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010. Y concretamente, entre otros, el capítulo, “5. La relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su legitimidad”. Por lo demás, nos remitimos al apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinarias”.

²⁸² Véase Capítulo 6, *nota 117*.

Dentro de los países de la UE-15 existía y existen un considerable diferencial entre los países nórdicos, continentales, anglosajones y mediterráneos²⁸³. Como queda especificado en la *Tabla 126* que mide la evolución del gasto social por lustros y por zonas regionales europeas, España junto con los otros países de la cuenca Mediterránea o Sur –Italia, Portugal, Grecia– van a ostentar las cifras más bajas en gasto social durante todos estos años. En este ámbito confluyen tanto políticas, económicas, culturales como sociales, lo que no es óbice para verificar el secular retraso de los países del Sur de Europa [véanse en el “anexo” la *Tabla 125* y la *Tabla 126*]²⁸⁴.

Gráfico 25. Evolución del gasto público en España y en la UE, 1982-1992 (% del PIB)



Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Por el momento, tenemos ya limitados otros dos hechos históricos contradictorios y complementarios a su vez: por un lado, el crecimiento del gasto social, y, por otro, la constatación del secular retraso social del país en relación a la media europea. Si lo segundo en pocas ocasiones se ha discutido en términos globales, por el contrario, la supuesta tesis del crecimiento del gasto social durante los gobiernos socialistas, sería instrumentalizado en su presente histórico y posteriormente para reafirmar el *carácter social* de estos mismos ejecutivos²⁸⁵.

²⁸³ Véase con detenimiento el trabajo de, RUEDA LÓPEZ, Nuria, BARRUSO CASTILLO, Begoña, CALDERÓN, Carmen y MAR HERRADOR, Mª del, “El grado de cobertura del gasto público en España respecto a la UE-15”, *Documento de Trabajo FUNCAS*, nº 328, (2007).

²⁸⁴ Entre otros estudios consúltase el de, ABRAHAMSON, P., “Regímenes europeos del Bienestar y políticas sociales europeas: ¿Convergencia de solidaridades?” en MORENO FERNÁNDEZ, Luis y SARASA URDIOLA, Sebastián (comps.), *El Estado del Bienestar en la Europa del Sur*, Madrid, CSIC, 1995, pp. 113-156. Todo ello junto con lo citado previamente en la *nota 28* y en la *nota 36*. A lo que debe sumarse como referencias centrales las siguientes: CUENCA GARCÍA, Alain, SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Antonio, BANDRÉS MOLINA, Eduardo y GADEA RIVAS, Mª Dolores, “El desarrollo del estado del bienestar moderno en el sur de Europa” en MARAVALL, José Mª (ed.), *Dimensiones de la..., op.cit.*, pp. 89-150; FERRERA, Maurizio, “The «Southern Model» of Welfare in Social Europe”, *Journal of European Social Policy*, vol. VI, nº 1, (1996), pp. 17-37; FLAQUER, Lluís, “La articulación entre familia y el Estado de bienestar en los países de la Europa del Sur”, *Papers*, nº 73, (2004), pp. 27-58. Y, por último, ÁLVAREZ MIRANDA, Berta, *El sur de..., op.cit.*

²⁸⁵ Hecho denunciado una y otra vez por la UGT: «Por ello creemos que frente al aluvión propagandístico que reciben los ciudadanos de nuestro país en relación con la política social y económica de este gobierno, teñido de autosatisfacción y falta de autocrítica». AHFFLC, Fondo Zufiaur, UGT-CE, “Circular nº 29. Secretaria General”, Madrid, 3 de julio de 1989, sig. 001639-001.

Pero una cosa son los datos en brutos, en donde los socialistas se convirtieron en consumados especialistas en publicitar las “virtudes” de las *extraordinarias* cifras de gasto social, siempre en términos macroeconómicos²⁸⁶; y otra muy diferente lo que las mismas reflejan una vez leídas en términos del porcentaje del PIB. Como recogíamos a partir de unas reflexiones de José María Maravall –a buen seguro uno de los *defensores* más lucidos pero también más realistas cuando no críticos de los gobiernos socialistas– se tenía, asimismo, que diferenciar el crecimiento cuantitativo de la más que cuestionable calidad de los servicios sociales²⁸⁷. Un *matiz* para nada menor.

En este campo no se puede obviar tampoco los condicionantes internos y externos a los que se enfrentaron los socialistas en estos diez años. Por el lado de los condicionantes internos, los costes de la salida de la crisis económica serían esgrimidos –una vez más– como argumento/pretexto durante su primera legislatura en el poder, de cara a frenar las demandas socio-sindicales en relación a un incremento del gasto social. Un mismo argumento cuestionado social y políticamente durante las siguientes legislaturas. Primero, ante los datos macroeconómicos sobre el crecimiento económico exhibidos como el logro más sobresaliente. Y, en segundo término, por su cerrazón en defender la “racionalidad” económica por encima de cualquier otra estrategia. Muestras todas ellas de los estrechos límites, en términos de *voluntad política*, por las que navegarían políticos y técnicos socialistas en este campo. Claro está, por otro lado, que a nivel externo aquellos mismos argumentos fueron difícilmente compatibles no sólo con intereses electorales, sino también con un asunto de mayor peso. La legitimación de un proyecto político que no podía seguir fundamentándose en el recurso a una solidaridad que, en la *praxis*, tan sólo tenía un único destinatario²⁸⁸.

Hasta la saciedad se ha repetido el *efecto arrastre* del 14-D de 1988²⁸⁹. Verdadero punto de inflexión en el cambio de rumbo del gasto social. En todo caso no debe confundirse el mismo con un pretendido cambio de estrategia socioeconómica²⁹⁰ ni etiquetarlo, como ha sido común,

²⁸⁶ Sin ánimo ni posibilidad de exhaustividad, GUERRA, Alfonso, “La década del cambio” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, pp. 11-20; o en el texto ya citado trabajo de quien fuera Ministra de Asuntos Sociales: FERNÁNDEZ BLANCO, Matilde, “Las políticas sociales en la década de los ochenta. Importancia y vigencia de las políticas de bienestar social” en *ibídem*.

²⁸⁷ MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia...”, *op.cit.*. En relación a esta cuestión, Joaquín Leguina denunciaría en una temprana fecha lo que consideraba que era un *craso error* por parte de la izquierda socialista: «Con todo, desde una óptica de izquierda quizá lo más grave del pensamiento economicista es su permanente apelación a las macromagnitudes con lo que el conjunto de la vida social tiende a verse reducido a esas cifras. La economía española no sólo sustituye a la sociedad española, sino que, la engulle borrando sus perfiles y también lo que, desde un punto de vista, no ya socialista; sino meramente, progresista, es fundamental: las diferencias». AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Sindical, Joaquín Leguina, “El discurso socialista en la encrucijada”, Madrid, octubre de 1987, sig. 002906-005, p. 7.

²⁸⁸ No es casual que dentro de la ‘academia’ se llegaría a reclamar a principios de los noventa la necesidad de tener ‘sindicatos dialogantes’: «Pero, nada más entrar España en la CE, proyecto de llegada a la Unión Económica y Monetaria, quizá en 1997, todo o cual plantea a España un triple reto de estabilidad macroeconómica, eficiencia microeconómica y equidad social. Reto que requiere como respuesta adecuada empresas competitividad, una Administración eficiente y sindicatos dialogantes. España no puede permitirse el lujo de que, los unos por los otros, nadie cumpla su papel». ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*, p. 256.

²⁸⁹ Véase “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

²⁹⁰ «[E]ste aumento [prestaciones sociales] no se debe tanto a un giro radical en la política social del Gobierno como a la presión –huelga general del 14-D–, a la propia inercia del gasto, al cambio de coyuntura y a las profundas transformaciones institucionales en el mercado laboral». GONZÁLEZ CALVET, Josep, “Prestaciones sociales, eficiencia y equidad. Análisis del gasto de protección social en España, 1982-1992” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 256. De igual opinión

con “cierto giro socialdemócrata”²⁹¹. La corta duración del pago de la “deuda social” ante el reconvertido argumento de los nuevos retos modernizadores así lo evidencia en términos históricos.

El concepto mismo del gasto social de los gobierno socialistas ha de leerse en una triple dimensión: primero, la estrictamente electoral; segundo, como la proyección de la legitimación del proyecto político; y tercero, el gasto social tendrían un componente plenamente utilitarista. Es decir, sería empleado en una doble vía desigual: pues mientras que el mismo tuvo como fin frenar, atenuar, posibles y potenciales conflictos sociales y obreros, este mismo condicionante ejemplifica la falta de un proyecto global sostenido en el tiempo, de cara a construir un verdadero estado del Bienestar en clave no sólo socialdemócrata sino en términos europeos²⁹². Todo ello, a pesar de que desde el propio PSOE no se dejará a principios de los noventa de insistir en cómo “por primera vez en la historia de España podemos hablar de un verdadero entramado del Estado de Bienestar, en la perspectiva de los países europeos más avanzados”²⁹³. Se avanzó, en suma, en un complejo marco de actuación, que ejemplificó a la postre la difícil combinación de una salida “liberal” en el campo de lo económico y una salida “social” en el terreno de la cuestión social. Dilema que terminó resolviéndose de la siguiente forma: pues mientras que el PIB creció 33 puntos porcentuales, el gasto público social sólo lo haría 13 puntos porcentuales²⁹⁴.

¿Cómo se tradujo lo anterior en términos macroeconómicos? Si atendemos a los datos brutos que ofrece el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social

sería, ETXEZARRETA, Miren, “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 8.

²⁹¹ MARÍN ARCE, José M^a, “Los socialistas en...”, op.cit., p. 46. Por su parte, nuevamente, James Petras iría más lejos en su habitual crítica irónica: «Sin embargo, la creencia de que el Partido Socialista es un partido reformista que se ha ‘desviado’, y de que se puede convencer o presionar a Felipe para que dé un ‘giro social’, está bastante extendida, al menos en algunos ambientes sindicales socialistas». PETRAS, James, “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español...*, op.cit., p. 26. Por su parte, la UGT nunca cerraría la puerta a un posible *giro social* por parte del Gobierno, aunque aquello con el paso del tiempo pasaría al terreno de las utopías. Al final de la ‘década del cambio’ señalaría: «Dedicarnos al reforzamiento del sindicato será mucho más rentable que abocarnos a tratar de desentrañar esa esquizofrenia conceptual, nada rigurosa, entre una política económica de derechas y una política social ‘de izquierdas’ cuando lo cierto es que se constata una línea pro-empresarial y prácticamente nada pro-trabajadores». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de gestión que presente la C.E.C. al V Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 17 y 18 de diciembre de 1992, p. 45.

²⁹² Véase al respecto el documentado trabajo de, ARRIBA, Ana, CALZADA, Inés y PINO, Eloísa del, *Las actitudes de los españoles ante el Estado del Bienestar*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006. Asimismo, GONZÁLEZ TEMPRANO, Antonio (dir.) y TORRES VILLANUEVA, Eugenio (coord.), *La política de...*, op.cit..

²⁹³ AHFPI, PSOE-CE, “Memoria Política y de Gestión de la CEF (1988-1990). 32 Congreso. Madrid 9-11 Nov. 1990”, Madrid, noviembre de 1990, sig. Fc 912, p. 7. Señalando asimismo: «Nuestro esfuerzo, además, ha tenido lugar en unos momentos económicos e internacionales poco propicios para tal empeño, en el que los demás países estaban efectuando ajustes y recortados gastos sociales. Por ello nuestra política social durante estos años adquiere un especial significado y alcance, hasta el punto de que se haya podido afirmar con toda razón que ‘nadie ha hecho tanto en política social en tan poco tiempo’». Ibídem, pp. 7-9. Para la contextualización de todo proceso, compleméntese lo anterior con lo apuntado en la nota 289.

²⁹⁴ Al respecto es de obligada lectura el estudio de Lester C. Thurow, quien demostraría empíricamente como un crecimiento real del PIB no conllevaba necesariamente una mejor redistribución, y por tanto una mayor igualdad social. Desmontando al mismo tiempo no pocos argumentos tan del uso de los gobiernos capitalistas de los años ochenta. Véase, THUROW, Lester C., *Corrientes peligrosas: el estado de la ciencia económica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Y unos años más tarde el fundamental trabajo colectivo de, RHODES, Martín (ed.), *Southern European Welfare States: between crisis and reform*, London, Frank Cass, 1997.

(SEEPROS)²⁹⁵ –el indicador más ajustado y refinado metodológicamente– se pasará de 3.683,00 mil millones de pesetas a 13.104,20 mil millones de pesetas entre 1982 a 1992. Es decir, un incremento de tres veces del gasto social en tan sólo diez años. Pero mientras esta elevación del gasto fue extremadamente lenta entre 1982-1987/1988, desde 1989 pasará de 8.613,90 mil millones de pesetas a la cifra ya reseñada para el último año de la “década del cambio”. Lo que permite, en último término, elevar la tasa porcentual global al final de la década. Con todo, el margen potencial de mejora en este campo para España, que a principio de los ochenta tenía el gasto social más bajo en lo que hoy es la UE-15 tan sólo por delante de Portugal y Grecia, sería indudable. Y como se ha insistido, su posición no se vería modificada. Diez años después seguiría ocupando el decimotercer lugar²⁹⁶.

De la misma forma, las cifras del SEEPROS ofrecen otros indicios de notable relevancia y que se vinculan al modelo social del país. Como es el lógico todas las partidas presupuestarias crecen en este tiempo, pero no todas con la misma velocidad ni intensidad. Mientras que los gastos en vivienda o familia crecen a un ritmo sostenido que aunque duplica, triplican o cuadruplican en términos constantes su aportación, su correlación en términos porcentuales es muy limitada.

Para comprobar lo anterior, se presenta en la *Tabla 130* la evolución del porcentaje sobre el PIB en relación al gasto social en cada una de sus partidas. Tres conclusiones sobresalen inmediatamente. Primero, el gasto por desempleo que sube un 1% del PIB, pasando del 2,93% al 3,87% entre 1982-1992. La explicación es nuevamente lógica: el pago del subsidio y otras aportaciones a los millones de parados durante este tiempo, así como en relación al incremento del trabajo temporal y, por consiguiente, al *efecto de rotación*. La segunda gran partida que se verá incrementada se encuentra relacionada con lo que se etiqueta como la “enfermedad”. Es decir, el gasto en sanidad en su conjunto que salta de 4,8% al 5,59%

²⁹⁵ En lengua anglosajona nos estamos refiriendo al “European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS)”, y cuya página de acceso es: europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/situation_in_europe/c10141_es.htm. Sobre su importancia estadística nos remitimos a lo comentado en los siguientes trabajos: AMURRIO, Roberto, “Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS)”, *Cuadernos de Acción Social*, nº 13, (1986), pp. 15-18; VICENTE MERINO, Ana Mª, “Los recursos para la financiación de la protección social”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 3, (1989), dentro del dossier monográfico dedicado a, *La protección social*; y dentro de ese mismo número, COMUNIDADES EUROPEAS, “Las unidades de observación del Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social: SEEPROS” (pp. 174-194). Por último, léase una ‘versión’ institucional acerca de la situación social en España a partir de dicha base de datos, por parte de quien fuera Subsecretario de Asuntos Sociales durante los gobiernos socialistas, TORRES SANAHUJA, Santiago de, “La pobreza en España. Análisis y líneas de actuación”, *Documentación Social*, nº 96, (1994), pp. 361-374. Por lo demás, véase lo ya señalado previamente en el apartado específico “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

²⁹⁶ Junto con lo apuntado en la *nota 284* y en otras, véase también: FERNÁNDEZ MORENO, Marta, “El gasto en protección social en los países de la Unión Europea durante el período 1980-1991”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 21-22, (1993), dentro del dossier monográfico titulado: *Clasificación profesional y movilidad*; AYUSO, Luis, “Protección social y sistemas de bienestar en la UE”, *Cuadernos Europeos*, nº 5, (2008), dentro del dossier monográfico dedicado a *Las perspectivas de los ciudadanos sobre el futuro de Europa*. Consúltese entre otros muchos informes de la Comisión Europea el publicado en mil novecientos noventa y cuatro: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *La protección social en Europa*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidades Europeas, 1994; y id., *Política social europea, un paso adelante para la Unión*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1994. Véanse aquí también, MAGADÁN DÍAZ, Marta y RIVAS GARCÍA, Jesús, *La Europa social*, Barcelona, Bosch, 1999; y, CARRASCO MORALES, Eva, *La cohesión económica social en la Unión Europea: consideración del caso español*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2000; GEYER, Robert R., *Exploring European social policy*, Cambridge, Polity Press, 2000; y para el conjunto de los países de la OCDE desde mediados del siglo XX hasta los años noventa, GLYN, Andrew y MILIBAND, David (eds.), *Paying for Inequality. The Economical Cost of Social Injustice*, London, Rivers Osam Press, 1994.

considerándose, en breve, el mismo como elevado y no sostenible, lo que coincidirá en el tiempo con una de las primeras propuestas “privatizadoras” del Sistema Nacional de Salud, en plena época socialista²⁹⁷. Y tercero, destacan por su escaso porcentaje sobre el PIB muchas de las partidas presupuestarias sobre las que, no obstante, los gobiernos socialistas fundamentarían buena parte de su relato discursivo: por ejemplo, las destinadas a promoción del empleo que tan

²⁹⁷ Así la *sanidad*, tras la aprobación de las leyes universales y su extensión numérica no escaparía, en breve, a ‘propuestas reformistas’. Principalmente de cara a frenar su gasto. Una vez más el argumento de la racionalidad, de la eficiencia económica y cómo no de la sostenibilidad del sistema se hicieron presentes. Muy relevante de la concepción de lo público por parte de los socialistas, sería el encargo, la redacción y la publicación del conocido ‘Informe Abril’ a mediados de junio de 1991 y presentado en el Congreso de los Diputados el 25 de septiembre de aquel mismo año [sobre su contenido véase su publicación en la revista de Medicina y Humanidades, *Jano*, vol. XLI, n° 963, (1991), pp. 45-69; CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO, *Comparecencia del señor Presidente de la Comisión de Expertos encargada del análisis y evaluación del Sistema Nacional de Salud (Abril Martorell), para informar de las conclusiones de la citada Comisión, creada por resolución de esta Cámara de fecha 13 de febrero de 1990. Solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista*, IV Legislatura, n° 306, 25 de septiembre de 1991 (número de expediente 219/000251), pp. 8693-8711. y consúltese también, Noticia, Azucena Criado, “Abril Martorell defiende con firmeza en el Congreso que los pensionistas paguen sus medicinas”, *El País*, 26 de septiembre de 1988]. Todo ello, a partir de la creación de una ‘Comisión de Expertos’ dirigida por Fernando Abril Martorell, quien fuera Vicepresidente Tercero del Gobierno de España (1977-1978) y Vicepresidente Segundo del Gobierno de España y Ministro de Economía (1978-1980) [sobre este relevante político consúltese la ya citada biografía de carácter hagiográfico de, LAMELAS GIL, Antonio, *La transición en...*, *op.cit.*] y que además estaría compuesta por: Enrique Costas Lombardía (Vicepresidente y Coordinador); Joan Josep Artells Herrero (Secretario); Rafael Alonso Pedreira, Luis Bohigas Santasusagna, Antonio García de Blas, Carmen Martín Aguayo, Francisco Martínez Borrego, José María Segovia de Arana (vocales); y Rafael Bengoa Rentería (colaborador técnico) Precisamente ocurría aquello en un momento en que España estaba a la cabeza en número de médicos por habitantes de la futura Unión Europea, cuando se tenía uno de los mejores indicadores de salud. Aunque, en verdad, no eran pocos los problemas que aquejaban al sistema en conjunto –falta de ATS y diplomados en enfermería, elevado gasto de los medicamentos, la ausencia de camas hospitalarias...– los mismos lejos de estar relacionados con un elevado gasto social o directamente con el fraude de los usuarios –recursos argumentativos repetidos de forma constante desde aquel entonces– más tenían que ver en realidad con las insuficiencias de un naciente sistema de protección social. Los siempre comedidos en sus valoraciones Carlos Alonso Zaldívar y Manuel Castells llegarían apuntar lo siguiente sobre el citado ‘Informe Abril’: «[T]iende a concentrarse en la contención de costos económicos, lo que frecuentemente se asimila con la introducción de mecanismos de gestión privados o cuasi-privados en el sector de la sanidad pública. En principio, esto parece suscitar una fuerte reacción contraria que si llega a paralizar los intentos de reforma, encerraría a la sanidad en una difícil alternativa entre la burocratización ineficiente y la privatización generadora de desigualdad, o lo que no sería mejor, una mezclas de ambas». ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*, p. 138. Primero sobre el impacto del ‘Informe Abril’ en aquel entonces –y cuyas verdaderas consecuencias últimas se verían en los siguientes lustros– consúltese entre otros posibles trabajos: VENTURA GARCÍA, Juan, “La reforma del Servicio Nacional de Salud: el Informe Abril”, *Información Comercial Española*, n° 708-709, (1992), pp. 53-62, dentro de un dossier monográfico dedicado al respecto; LÓPEZ i CASASNOVAS, Guillem, “El Informe «Abril» de reforma de la asistencia sanitaria”, *Papeles de Economía Española*, n° 48, (1991), pp. 99-105; FRANCIA VIÑA, José M^a, *Veinticinco años de reforma sanitarias: de la transición al gobierno del Partido Popular (1970-1995)*, Salamanca, Hespérides, 1997; a destacar, en cualquier caso, la completa obra de, JURADO SALVÁN, Enrique, *Crónica de la transición sanitaria en España (1977-1992): del discreto encantado de la reforma prometida al informe abril*, Madrid, E. Jurado D.L., 1993. En todo caso, para entender la profunda transformación del sistema sanitario desde principios de los ochenta, véanse también, entre otros trabajos, los de, GUILLÉN, Mauro F., “Procesos de cambio en la estructura ocupativa del sector sanitario español”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 37, (1987), pp. 173-206; DURÁN, M^a Ángeles, *Desigualdad social y enfermedad*, Madrid, Tecnos, 1983; y en concreto: MARTÍN LÓPEZ, Enrique (ed.), “Seguridad Social, Sanidad y Servicios Sociales en España (1975-1983)” en MURILLO FERROL, Francisco (dir.), *Informe sociológico...*, *op.cit.*, II vol., pp. 827-916; para los noventa en adelante: ELOLA, Javier y NAVARRO, Vicenç, “Análisis de las políticas sanitarias españolas, 1975-1992”, *Sistema*, n° 126, (1995), pp. 19-39.

sólo sube tres décimas (0,18% al 0,21%); las correspondientes a la maternidad o la familia que, a bien se mantienen en sus grandes rasgos en el primer caso –del 0,24% al 0,20%– o, por otro, descienden significativamente en el segundo caso –pasa del 0,42% al 0,20%–. Pero es que, además otras cifras, como el gasto destinado por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional, la invalidez o incapacidad, a muy duras penas puede constatarse elevación porcentual alguna²⁹⁸. Todo lo contrario que las partidas destinadas a lo que se califica como “supervivencia”. Recurso de último grado para ayudar a las rentas más bajas o en situación de exclusión social.

Si se procede a un análisis comparado, a partir de la elaboración de un Índice de Cobertura del Gasto en Protección Social respecto al promedio de la Unión Europea, tal como lo realizaron José Emilio Boscá, María Fernández y David Taguas en un relevante trabajo –*El gasto en Protección Social en España: un análisis comparado con la Unión Europea*²⁹⁹ [consúltese en el “anexo” la *Tabla 130*]– se comprueba, asimismo, el bajo nivel relativo de estas prestaciones desde las perspectivas apuntadas. Si excluimos el gasto por desempleo siempre notablemente superior a la media europea, el resto de las partidas presentan niveles más bajos. A pesar de que se percibe en la mayor parte de los gastos sociales un nivel de convergencia en positivo –exceptuando los gastos por maternidad, familia y promoción del empleo nuevamente– se acreditan, nuevamente, los problemas no coyunturales sino también estructurales para alcanzar la convergencia social real con Europa [véanse en el “anexo” la *Tabla 127*, la *Tabla 128*, la *Tabla 129*, la *Tabla 130* y la *Tabla 131*].

El carácter subsidiario del gasto social es evidente³⁰⁰. No es exagerado hablar de un claro *déficit social*³⁰¹. O dicho con otras palabras, el “Estado de bienestar español está

²⁹⁸ Consúltese el siguiente informe al respecto, GALA VALLEJO, César, *Las pensiones de invalidez, jubilación y muerte y supervivencia en el sistema de la Seguridad Social española*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.

²⁹⁹ BOSCA, José Emilio, FERNÁNDEZ, M^a y TAGUAS, David, “El gasto en Protección Social en España: un análisis comparado con la Unión Europea”, *Documentos de Trabajo de la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda*, n° D-97003, (1997). Trabajos de relevancia en esta línea, junto con las obras ya citada de Vicenç Navarro –véase en la *Presentación*, nota 127– en, LAGARES CALVO, Manuel Jesús, “Niveles de cobertura del gasto público en España”, *Papeles de Economía Española*, n° 37, (1988), pp. 150-173, dentro de un dossier monográfico dedicado al *Gasto Público*, en donde también destaca el trabajo de, BORRELL, José, “Evolución y tendencias del gasto público” (pp. 174-183); ABRAHAM, Filip, “Social protection and regional convergence in a European Monetary Union”, *Open Economies Review*, vol. V, n° 1, (89-114); ALONSO, Javier, GALINDO, Miguel Ángel y SOSVILLA-RIVERO, Simón, “Convergence in social protection benefits across EU countries”, *Documentos de Trabajo. FEDEA*, n° 97-03, (1997). Una visión general en, JAÉN GARCÍA, Manuel, *Evolución contemporánea del gasto público en España*, Almería, Universidad de Almería, 2004. Por último no deje de consultarse el informe global de, EUROSTAT, *Social Protection Expenditure and Receipts, 1980-1993*, Luxembourg, Eurostat, 1993. Y una vez más lo también apuntado en el *Capítulo 2*, nota 241.

³⁰⁰ A la hora de emplear el calificativo de *subsidiario* para calificar dicho sistema de protección social, ha de tenerse presente en cuenta, al mismo tiempo, la importancia el papel que juega la familia dentro de los países del sur Mediterráneo. Una importancia doble: primero, como estructura complementaria del bienestar social cuando no como poderosa barrera de cara contra la exclusión social; y segundo, como vehículo central de la estructura social que a su vez diluye potenciales conflictos socio-económicos. Al respecto, y aunque en los siguientes apartados se volverá sobre esta cuestión, no deje de leerse varios trabajos en esta misma línea: MORAL, Félix, “Los desempleados en la unidad familiar: proveedores y dependientes”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 86, (1999), pp. 153-184; EGUREN, Nerea, “Familia y Estado: el reparto del bienestar”, *Abaco*, n° 29-30, (2001), pp. 101-122; GOERLICH GISBERT, Francisco José y VILLAR NOTARIO, Antonio, “Desigualdad y bienestar en España y sus Comunidades Autónomas (1973-2003)”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. XVII, n° 50, (2009), pp. 119-152. Y asimismo para nuestro caso, GUILLÉN, Ana M., “Regímenes del bienestar y roles familiares: un análisis del caso español”, *Papers*, n° 53, (1997), pp. 45-63. Y en términos generales de nuevo la obra cumbre de, ESPING-ANDERSEN, Gøsta, *Los tres mundos...*, *op.cit.*, quien establecía

subdesarrollado, y el gasto social (tanto en trasferencias como en servicios) es menor que lo que le corresponde a su nivel de desarrollo”³⁰². Un sistema de protección social que, a lo largo de esta década, no frenó la extensión de la denominada “nuevas formas de pobreza”³⁰³ ni permitió reducir los denominados hogares pobres³⁰⁴.

tres grandes modelos: el liberal, el corporativista-conservador y el socialdemócrata. Por último también véanse, GARRIDO, Luis y GIL CALVO, Enrique (eds.), *Estrategias familiares*, Madrid, Alianza, 1993; MUÑOZ MACHADO, Santiago, GARCÍA DELGADO, José Luis y GONZÁLEZ SEARA, Luis (dirs.), *Las estructuras del bienestar: propuesta de reforma y nuevos horizontes*, Madrid, Civitas / Escuela Libre Editorial, 2002; y de forma concreta, PÉREZ DÍAZ, Víctor, CHULIÁ, Elisa y ALVAREZ-MIRANDA, Berta, *Familia y sistema...*, *op.cit.*. Por lo demás téngase presente lo apuntado en la *nota* 284.

³⁰¹ De muy diferente opinión eran los socialistas quienes rara vez admitieron críticas y/o errores en este campo tan vital para su propia proyección pública y política: «Ofrece pocas dudas, por consiguiente, el sesgo redistribuidor de la seguridad social como resultado de la política instrumentalizada en los años de gobierno socialista en los que se ha combinado la potenciación del carácter contributivo con la consecución de unos niveles de pensiones mínimas que proporcionen elementos básicos de bienestar a millones de ciudadanos españoles ancianos, incapacitados o carentes de todo recurso y en manifiesta situación de necesidad». MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-equidad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 219. Una realidad diametralmente opuesta a la que ofrecía, sin ir más lejos, los informes del Instituto Sindical de Estudios dependiente de UGT. Un ejemplo: «En definitiva, lo que ocurre es que no hay voluntad de crear en España un Estado de Bienestar. Los países comunitarios gastan anualmente de media once puntos más de su riqueza nacional que España. De cada cien pesetas que produce la sociedad española, diecisiete las dedica a protección social. Los países de la CEE dedican una media superior a las veintiocho pesetas. No son válidos los argumentos de que otros países son más ricos y por ese motivo no podemos nosotros gastar lo mismo. No se trata de que gastemos menos o más cantidad de recursos, sino de que la proporción que los nuestros dedicamos a la cobertura social es muy inferior a la que de los suyos dedican en media los países de su entorno. Incluso los más atrasados en este terreno, como Grecia o Irlanda, han iniciado una senda de decidido acercamiento, bien distinto de la política que se ha aplicado en nuestro país durante los últimos años». AHFFLC, INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS, “Algunas notas introductorias al debate sobre el giro social”, Madrid, enero de 1989, sig. AI-174-03., p. 7.

³⁰² NAVARRO, Vicenç, “Neoliberalismo, desempleo...”, *op.cit.*, p. 57. Y añadía unas líneas más adelante: «La tesis de la exuberancia del Estado de Bienestar en España no es sostenible. Ni tampoco es sostenible la postura de que el gasto social está obstaculizando el desarrollo económico y la creación de empleo». *Ibíd.*, p. 60.

³⁰³ Entre otras muchas definiciones que en sucesivos apartados se irán ampliando, por el momento, puede ser válida proporcionada por el sociólogo Jesús de Miguel: «Se trata de la miseria de personas jóvenes, incluso con un empleo cualificado [...]. Se emplea en un tono dramático, asegurando que la pobreza es un problema de familias y no sólo de personas, y por lo tanto de generaciones futuras. Pero no se diseñan políticas apropiadas para solucionar esta nueva pobreza. La situación es más bien estructural. Se utiliza insistentemente una definición estadística de ‘umbral de la pobreza’, que lo que mide en realidad es desigualdad social. La solución es interpretar la pobreza como un proceso de *dualización de la estructura social*, combinado con un proceso de *exclusión social*». MIGUEL, Jesús de, *Estructura y cambio...*, *op.cit.*, p. 282. Asimismo no está de más tener presente las categorizaciones empleadas en una de las obras cumbres con respecto a la cuestión social. Nos referimos a la obra de Robert Castel, cuando el mismo autor hablaba de *situaciones periféricas* y concretamente del *cuarto mundo*. CASTEL, Robert, *La metamorfosis de...*, *op.cit.*, pp. 373-ss. Complementéase lo anterior con lo apuntado en la *Presentación*, *nota* 93, así como en las *nota* 23, *nota* 30 y *nota* 36.

³⁰⁴ «La composición de los hogares pobres [a partir del *Estudio de los hogares menos favorecidos, según la Encuesta de Presupuestos Familiares, 1990-1991*, Madrid, INE, 1993] sugiere que las tradicionales causas de pobreza, esto es, el paro de larga duración, la vejez y la invalidez, siguen vigentes. Asimismo, muestra que las reformas del subsidio de desempleo, el reducido nivel de las pensiones mínimas y asistenciales, la falta de programas de ayuda familiar y el escaso desarrollo de programas de pensiones no contributivas de carácter universal han contribuido al mantenimiento de los niveles de pobreza a pesar del crecimiento económico de la segunda mitad de los ochenta». GONZÁLEZ CALVET, Josep, “Prestaciones sociales, eficiencia y equidad. Análisis del gasto de protección social en España, 1982-1992” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 256. Y entre otros datos

Asimismo otros autores han hablado de la conversión del “Estado social” en “Estado-Empresa, en Estado Beneficio”³⁰⁵. Mientras que, por otra parte, no pocos especialistas han insistido en el proceso de dualización del sistema del precario estado del Bienestar en su vertiente de protección social, llegándose a una posible diferenciación entre el estado del Bienestar propiamente dicho y un naciente “estado Asistencial”:

«[L]a extensión de los derechos sociales no se han frenado durante estos años de crisis, de forma que la universalización de la educación, sanidad y servicios sociales, así como del sistema de pensiones ha seguido su curso, pero, por otra parte, el paro estructural y las nuevas formas de pobreza y marginación generadas por la flexibilidad del mercado de trabajo han producido lagunas protectoras no sólo en los parados de largo alcance, sino en los trabajadores con contratos precarios que agotan con rapidez el tiempo de acceso a las prestaciones o ven deteriorada su carrera de seguro»³⁰⁶.

Por estos mismos caminos, se cubrieron –cuando fue así– a muy duras penas las principales demandas de protección social de un país con el nivel de desarrollo económico como España. Pero, ahora demos un paso más allá. De ninguna de las formas –si prestamos atención a las cifras disponibles– en modo alguno se puede hablar de la insostenibilidad y/o de la inviabilidad de la Seguridad Social como de forma habitual sucedió durante estos años³⁰⁷. Antes

aportaba los siguientes para principios de la década de los noventa: «[E]ntre 1981 y 1991 la proporción de hogares pobres no ha disminuido sino más bien al contrario, pasando del 19,5% al 19,7% [...]. En efecto, el 33,5% por ciento de los hogares que tienen como sustentador principal a un mayor de 65 años es pobre, lo que representa el 42,5% de los hogares pobres. De modo análogo, el 31% de los hogares con el sustentador en paro o el 26,4% en los que es la mujer quien aporta los ingresos son pobres. De entre los hogares pobres, el 51,2% obtiene sus ingresos de alguna pensión». *Ibídem*, pp. 256-257.

³⁰⁵ ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, *op.cit.*, p. 19. Señalando a continuación: «[Q]ue asume como central la lógica del mercado, la libertad y el incremento del beneficio, transforma los derechos sociales en oferta (generosa) de beneficencia». *Ibídem*.

³⁰⁶ RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, “Integración, asistencialización y exclusión en el Estado del Bienestar” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, pp. 274-275. Y en cuanto a lo que el autor denomina el ‘Estado Asistencial’ indicaba: «[E]s la verdadera novedad de este periodo histórico: de ser un sistema residual o actualización modernizada de leyes de pobres ha tenido una expansión sin precedentes [...]. Este sistema desarrolla dos funciones contradictorias: por un parte, es un mecanismo de extensión de los derechos sociales con una fuerte capacidad de legitimación política, aunque no cierra el círculo de la universalización del bienestar [...]; pero, por otra parte, se trata de un sistema de protección de estricta supervivencia para importantes grupos de población y claramente diferenciado de la calidad de las prestaciones del primer nivel [...] además suelen concentrarse, las críticas ideológicas respecto a su falta de rentabilidad económica y social y fomento del sentimiento de culpabilidad y carga social de los que se benefician de este sistema». *Ibídem*, p. 257. Por el contrario, otros muchos autores han insistido en un difícil equilibrio, en donde no sería posible hablar de un «proceso de dualización en la sociedad española de los ochenta». ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*, p. 118. En concreto, afirmaban no sin contradicciones lo siguiente: «Lo cual, unido a la reducción relativa del nivel de pobreza, permite suponer que no hay proceso de dualización en la sociedad española de los ochenta, si bien se produce un aumento de la desigualdad. Los ricos son más ricos en términos absolutos, pero no gastan más que a mediados de la década en términos relativos. Los pobres no son más pobres y no hay cada vez más pobres, aunque los niveles de pobreza son todavía elevados, en relación con la media de la CE, y alcanzan a algo menos de una quinta parte de la población». *Ibídem*. Para todo lo anterior desde una perspectiva crítica nos remitimos al que hoy ya se puede considerar un libro clásico, ANISI, David, *Creadores de escasez...*, *op.cit.*. Por lo demás, véase la profusa bibliografía básica apuntada en el Capítulo 2, *nota 241*.

³⁰⁷ Sin negar la situación de crisis por la que atravesaría, tanto a principios de la década de los ochenta como a principios de los noventa, la ‘caja’ de la Seguridad Social, no obstante, y según ha demostrado Vicenç Navarro en repetidas ocasiones, la *viabilidad* del sistema en su conjunto realmente no puede cuestionarse con los datos procedentes de la propia Contabilidad Nacional. Otra cuestión radicalmente diferente serían las declaraciones de destacados miembros del Gobierno en clave para nada socialdemócratas, a lo que se sumarían otras tantas de ‘socialistas liberales’ cuestionando el futuro de la Seguridad Social. Un ejemplo será lo suficientemente explícito de lo que aquí se quiere dejar constatado. Declaraciones, por lo demás, que, no casualmente, se realizaban en las sedes de los grandes poderes

al contrario, como queda gráficamente representado en la *Tabla 130* y en la *Tabla 131*, el total de las cotizaciones sociales se acercaba notablemente al gasto global en esta materia³⁰⁸. Por su parte, el monto de las aportaciones públicas con ser importantes, significarían un crecimiento

económicos-financieros (Club Siglo XXI, Asociación para el Progreso de la Dirección...). Todo ello en locales lujosos del centro de la capital del país. Nos detendremos en un ejemplo altamente relevante. Primero, el caso de la conferencia de Joaquín Almunia realizada el día 26 de enero de 1984 en el Club Siglo XXI, en donde declararía –según la versión transcrita– entre otras cuestiones lo siguiente: «Pues bien, en los últimos años el ritmo de crecimiento que han experimentado los gastos del conjunto del sistema de Seguridad Social coincidiendo con problemas crecientes para su financiación, ha sido tal que, de continuar en el futuro próximo, la viabilidad financiera del sistema, y con ella, la de nuestro sector público, entraría de lleno en zona de peligro». No terminaban ahí sus avisos, pues como reconocía unas líneas más adelante el verdadero propósito de su mensaje era bien otro: «De cara al futuro próximo, es evidente que el ritmo de crecimiento de la aportación del Estado deberá desacelerarse, puesto que la política de reducción del déficit público es un imperativo irrenunciable para mantener flujos de financiación al sector privado». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Acción Sindical, ALMUNIA, Joaquín, “Las relaciones laborales y la crisis económica”, Madrid, 26 de enero de 1984, sig. AI 502-003, p. 11. Por su parte, y como criticará Emilio de la Fuente en nada o poco ayudaban declaraciones públicas de altos dirigentes de la administración del Estado: «¿Cuál es el déficit público de la Seguridad Social? El señor Borrell aparece el otro día en televisión nos dice que el déficit de la Seguridad Social es de 2.100 millones diarios, pero, ¿qué significa eso? La Seguridad Social siempre tiene déficit porque entonces no sería Seguridad Social [...]. Hay una transferencia del sector público a la Seguridad Social que tiene que hacerse siempre. Plantear eso como un déficit es un error». FUENTE, Emilio de la, “Las etapas de la política económica del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit., p. 87. En este sentido, también conviene repasar las ‘otras cifras’ aportadas por el propio Ministerio de Trabajo en dos informes de los muchos que publicó y que vienen a cubrir las fechas extremas de este trabajo de investigación: MINISTERIO DE TRABAJO, *Libro Blanco sobre la Seguridad Social*, Madrid, SubSecretaría de la Seguridad Social, 1979; MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *La seguridad social en el umbral del siglo XX. Estudio económico-actuarial*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1996. Por último, DUEÑAS HERRERO, Laurentino Javier, “La viabilidad del sistema de Seguridad Social. Entre la solidaridad y el ahorro: ¿reparto versus capitalización?”, *Aranzadi Social*, nº 2, (1996), pp. 2533-2560; CÁRCELES BREIS, Gabriel, “La polémica sobre las prestaciones sociales de la vejez: demografía y economía política versus sociología de la ancianidad”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 73, (1996), pp. 191-207.

³⁰⁸ «Según el Anuario de Estadísticas Laborales de 1992 y el Boletín Estadístico del Banco de España, las cotizaciones sociales representaron el 70 por 100 de los ingresos totales de las transferencias sociales (protección social) en 1992 [...]». NAVARRO, Vicenç, “Neoliberalismo, desempleo...”, op.cit., pp. 60-61. Por su parte desde el ámbito socialista no se dudaría en afirmar: «Una panorámica de la situación del sistema en 1982 debería poner de relieve necesariamente la comprometida viabilidad del sistema en lo relativo a su equilibrio económico-financiero, la escasa proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones, la inexistencia de una modalidad no contributiva y la exclusión de un numeroso grupo de población –mujeres, fundamentalmente– de su esquema de protección en razón de su escasa presencia en el mercado de trabajo en las décadas precedentes». MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-equidad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 217. Véase, en este sentido, también, id. “Evolución y financiación del Estado del Bienestar” en FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás y GARCÉS FERRER, Jorge (coords.), *Crítica y futuro del Estado del Bienestar: reflexiones desde la izquierda*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 293-318. Y desde las filas gubernamentales, ZABALZA, Antonio, “Efectos económicos de las cotizaciones a la Seguridad Social” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, op.cit., vol. III, pp. 1119-1142; GARCÍA DE BLAS, Antonio, “La financiación de la Seguridad Social en España: fiscalización frente a disminución de cotizaciones”, *Información Comercial Española*, nº 630-631, (1986), pp. 77-86. Por lo demás, junto con lo apuntado en las *nota 176* y *nota 203*, ESCOBEDO LÓPEZ, M^a Isabel, *La financiación de la Seguridad Social y sus efectos finales sobre el empleo: evidencia empírica en España, 1975-1983*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992; URQUIZU CAVALLÉ, Ángel, *Las cotizaciones a la Seguridad Social*, Madrid, Marcial Pons, 1997, con prólogo de Antonio Agulló Agüero; PÉREZ INFANTE, José Ignacio, “Análisis económico de la financiación de la Seguridad Social española”, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 38, (1997), pp. 190-237.

perfectamente asumible para un país que crecía mucho más en términos del PIB que en gasto social³⁰⁹. Un apartado este último en donde también se refleja, otra vez, el *efecto arrastre* del 14-D. Y si por último nos fijamos en las rúbricas más significativas de las cuentas de la Seguridad Social, la necesidad de financiación cuando no ofreció resultados positivos –caso del año ochenta y nueve con un superávit de más de doscientos mil millones de pesetas– tampoco conllevó cifras alarmantes.

Por concluir con un ejemplo práctico. El tema de las prestaciones en materia de pensiones conjuga por sí sola la posibilidad de discernir todo lo hasta aquí apuntado³¹⁰. Al igual que viéramos con el Salario Mínimo Interprofesional, en el caso de las pensiones estaban en juego por lo menos tres factores; primero, junto a la tesis del carácter social de los gobiernos socialistas, su manifiesta voluntad política en afrontar, adecuadamente, un apartado especialmente deficitario dentro del estado del Bienestar; segundo, el carácter eminentemente electoral que contenía el tema de las pensiones en un país en donde los potenciales beneficiarios de tales prestaciones conformaban una no desdeñable bolsa de votantes; y tercero, el carácter teóricamente “solidario” que conllevaban dichas partidas.

Los socialistas harían gala a lo largo de su mandato de cómo el número de pensionistas se incrementarían en más de un millón y medio de beneficiarios. De este modo, las pensiones constituían a finales de mil novecientos noventa y dos el 60% de las prestaciones sociales totales. Así es cuando se observa el total de beneficiarios tanto por jubilación, invalidez, viudedad, orfandad o a favor de familiares. En todos y cada uno de los apartados, a nivel cuantitativo, crecerían dichas partidas. Todavía más, el gasto solamente por función de vejez pasaría de 1.173,50 mil millones de pesetas en 1982 a 4.056,60 mil millones de pesetas en 1992. Porcentualmente pasaría del 5,95% al 6,71% en total del gasto social sobre el PIB³¹¹.

Igualmente en este periodo –consúltese, nuevamente, la *Tabla 134*– se asistirá a la implantación de las prestaciones no contributivas así como las relacionadas con la maternidad³¹². Dos grandes pasos en la configuración de un siempre inconcluso estado del Bienestar. No casualmente coinciden con los años de mayor gasto social tras las políticas

³⁰⁹ En este caso, nos remitimos a los datos ofrecidos desde las propias filas socialistas: «La aportación del Estado a la Seguridad Social ha pasado de financiar en 1982 al 15 por 100 del presupuesto de la Seguridad Social al 5 por 100 en 1991. Correlativamente las cotizaciones han disminuido ocho puntos su peso en la financiación de dicho presupuesto». FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit., p. 189.

³¹⁰ Véase lo apuntado en la *nota 296* y *nota 314*.

³¹¹ Para más datos sobre esta importante cuestión nos remitimos a, CASTELLS, Manuel y PÉREZ ORTIZ, Lourdes, *Análisis de las políticas de vejez en España en el contexto europeo*, Madrid, Instituto Nacional de Servicios Sociales, 1992.

³¹² Ley 26/1990, de 20 de diciembre, *por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas*, vigente hasta la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social* [B.O.E. 29 de junio de 1994]. Consúltese asimismo, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Estudios preparatorio para la Ley de prestaciones no contributivas*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991. Sobre su contenido jurídico-normativo y sus consecuencias socioeconómicas consúltense: GARGAS FERNÁNDEZ, Josep, *Análisis crítico del sistema español de pensiones no contributivas*, Navarra, Aranzadi, 2002; FERNÁNDEZ ORRICO, Javier, “La modalidad asistencial básica de Seguridad Social desarrollada en España: las pensiones no contributivas”, *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, nº 34, (2002), pp. 97-128. Y en términos más genéricos: AGUILERA IZQUIERDO, Raquel, BARRIOS BAUDOR, Guillermo y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Yolanda, *Protección social complementaria*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid / Facultad de Derecho, 2003. De cara a una comparación con Europa sobre esta cuestión: GONZALO GONZÁLEZ, Bernardo, “Las pensiones no contributivas en Europa” en MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Los sistemas de Seguridad Social y las nuevas realidad sociales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, pp. 123-142. De cara a ampliar todas cuestiones, nos remitimos a lo apuntado en la *nota 289*.

restrictivas de toda la década ochenta. Pero, en paralelo, se produce un fenómeno nuevo o cuando menos *inesperado* que también afectará seriamente a estas partidas: el inicio del proceso de las jubilaciones anticipadas que empezará a expandirse a partir de la crisis de los noventa y se consolidará años después de forma exponencial³¹³. El crecimiento cuantitativo de las partidas del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSALUD), una vez reducidas notablemente las cuotas delegadas por empresas, será transcendental para el soporte del sistema en su conjunto.

Ahora bien, de nuevo, este fenómeno sería limitado en el tiempo, pues a partir de 1993 se produciría una bajada considerable en relación a estas prestaciones, a través de un doble argumento: la crisis económica y el fraude. No mucha más tarde tras el *Pacto de Toledo* –que se aprobaría en sede parlamentaria un 6 de abril de 1995– vendría a cuestionarse seriamente la viabilidad de la “hucha de las pensiones”³¹⁴ introduciendo por este canal –al igual que por otros tantos– la idea subyacente de completar las mismas con planes privados de pensiones³¹⁵.

El gasto de la pensión media a pesar de incrementarse anualmente de forma sostenida – se pasaría de 19.857 pesetas mensuales a 52.555 pesetas mensuales en los años de estudio– conllevaría – a pesar de las cifras dadas– una pérdida del poder adquisitivo de cinco puntos

³¹³ En torno a esta importante cuestión derivada, en primer lugar, de la crisis de los noventa, y que afectaría con el paso del tiempo a dos generaciones de trabajadores, y cuyos efectos ya no sólo son de tipo económico sino también culturales, sociales y psicológicos... el mismo ha ocupado un lugar muy secundario en la agenda social de las Administraciones Públicas. Nos remitimos aquí a tres trabajos centrales: LÓPEZ CUMBRE, Lourdes, *La prejubilación*, Madrid, Civitas, 1998; ESTEVE SEGARRA, M^a Amparo, *La jubilación forzosa*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999; MEDINA GONZÁLEZ, Manuel, *Prejubilación ¿premio o pesadilla? Guía práctica de prejubilación, jubilación anticipada y jubilación*, Jaén, El Olivo, 2001.

³¹⁴ En primer lugar consúltese el informe institucional del todo aclaratorio: CORTES GENERALES DEL CONGRESO, *Informe de la ponencia para el análisis y de los problemas estructurales del Sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse. Pacto de Toledo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1996. Un balance de su funcionamiento a los diez años de su puesta en marcha, muy descriptivo de los objetivos alcanzados y no alcanzados: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, *Diez años del Pacto de Toledo, 1995-2005*, Madrid, Instituto Nacional de la Seguridad Social, 2005. Sobre su contenido y objetivos nos remitimos a las dos siguientes obras de carácter general: BLASCO LAHOZ, José Francisco, *La reforma de la Seguridad Social: el Pacto de Toledo y su desarrollo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997; y, BARRADA RODRÍGUEZ, Alfonso y GONZALO GONZÁLEZ, Bernardo, *La financiación de la protección social en España: a propósito del Pacto de Toledo*, 2^a ed., Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.

³¹⁵ Entre otros muchos ejemplos, teniendo presente, de entrada, la clara hegemonía academia liberal en este campo: BENGOCHEA, Juan y ERRASTI, José M^a, “El futuro de las pensiones”, *Información Comercial Española*, n^o 736, (1994), pp. 145-167; HERCE SAN MIGUEL, José Antonio, “Papeles y el debate sobre las pensiones en España, 1979-2004”, *Papeles de Economía Española*, vol. I, n^o 100, (2004), pp. 2-9, dentro del dossier monográfico, *25 años de información económica*. Por su parte, las principales entidades interesadas en la modificación del sistema público de pensiones, es decir, las entidades financieras, en breve, comenzarían a producir y a publicar una infinidad de informes con una única tesis: la insostenibilidad del citado sistema y no pocos mensajes de ‘miedo’ sobre el futuro incierto. Dos ejemplos sin salirnos del tiempo de la época socialista: HERCE, José A. y PÉREZ-DÍAZ, Víctor (dirs.), *La reforma del sistema público de pensiones en España*, Barcelona, La Caixa, 1995; BAREA, José y GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel (dirs.), *Pensiones y prestaciones por desempleo*, Bilbao, Fundación BBV, 1996. Una dura y realista crítica de las anteriores visiones en, CADARSO, M^a Ángeles y FEBRERO, Eladio, “Sistemas de reparto *versus* sistema de capitalización. Algunas reflexiones críticas”, *IX Jornadas de Economía Crítica*, Madrid, marzo de 2003 [ponencia] [www.ucm.es/info/ec/jec9/areas.htm], quienes llegan a tildar dichos análisis de pre-keynesianos. Asimismo véanse, las reflexiones y datos aportados por quien fuera Ministro de Trabajo, MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “Socialdemocracia y seguridad social: un amor correspondido” en ÁVILA FRANCÉS, Juan [et al.], *Estado de bienestar...*, op.cit., pp. 263-278. Y a nivel internacional nos remitimos al trabajo de, QUEISSER, Monika y WHITEHOUSE, Edward, “Comparación de las promesas de pensión de treinta países de la OCDE”, *Revista Internacional de Seguridad Social*, vol. LIX, n^o 3, (2006), pp. 53-84.

porcentuales con la situación inicial. Una vez más se evidencia la divergencia entre extensión numérica y la calidad³¹⁶. En la *Tabla 135* se ha procedido a calcular la pensión media en comparación con el PIB por habitante. Así mientras que 1982 las 18.857 pesetas mensuales y el PIB por habitante calculado en 520.962 pesetas suponían un porcentaje del 53,3% en términos de poder adquisitivo; en 1982, las 52.555 pesetas mensuales de pensión en relación con las 1.504.543 pesetas del PIB por habitante tan sólo significan el 48,9%³¹⁷. En suma, la “*posición relativa* de [este] colectivo ha *empeorado*” como destacó Josep González Calvet³¹⁸ [véanse en el “anexo” la *Tabla 133*, la *Tabla 134* y la *Tabla 135*].

Con todo, y como ya se ha dejado apuntado, las funciones y cuentas de la Seguridad Social no escaparían de duros debates y batallas políticas y sociales como venimos repitiendo. Ejemplo de ello serían dos de las tres convocatorias de huelga generales para el periodo de estudio. Un *record huelguístico* en términos históricos. Exceptuando el caso de la huelga del 14-D de 1988, un paro general relacionado con el frustrado proyecto del Plan de Empleo Juvenil³¹⁹; la convocatoria del 20 de junio de 1985 y la del 28 de mayo de 1992 tuvieron una relación directa con las *cuentas* de la Seguridad Social. Desde el Gobierno, tanto en la de 1985 como en la de 1992, se combinaron verdades, argumentos/pretextos, acusaciones y veladas “amenazas”³²⁰. Por el lado de las *verdades* –siempre, lógicamente, *relativas*– las dificultades económicas por las que se atravesaban en cada momento el *sistema* en su conjunto, a sumar los problemas relacionados con las carencias técnicas del mismo; por el lado, de las *argumentos/pretextos*, la idea de la racionalidad, eficiencia y sostenibilidad de las cuentas públicas; y por el de las *acusaciones*, una vez más, tenían tan solo destinatario: los trabajadores/asalariados/pensionistas que cometían fraudes o que bien habían adquirido la *mala costumbre* de rechazar puestos de trabajo no favorables que solían, demás, a no ajustarse a su perfil profesional. Acusaciones hábilmente revestidas con las conocidas “campañas de eficacia”.

³¹⁶ A modo de ejemplo ofrecemos el balance previamente ‘instrumentalizado’ de Francisco Fernández Marugán, como uno de los ejemplos más acabados de la utilización interesada y parcial de los datos a la *mejor luz posible*: «Esta mejora de poder adquisitivo también es aplicable al conjunto de pensiones, que han visto incrementada su ganancia real en 2,7 puntos en 1989, 4,4 puntos en 1990 y 3,1 en 1991. Tomando como referencia todo el período de recuperación, el incremento del poder adquisitivo de la pensión media mensual ha sido de más de 17,2 puntos». FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 183.

³¹⁷ Por su parte Jesús de Miguel aporta las siguientes cifras: «La pensión media en realidad desciende un 5% entre 1980 y 1992, pasando de representar el 52% al 49% del PIB. La política social del sector público es de mero mantenimiento de las pensiones, no llegando ni siquiera a igualar el crecimiento de la economía. El poder adquisitivo de esas pensiones difícilmente se mantiene. No se puede pretender cambiar de signo los procesos de desigualdad social con estos datos. El país se desarrolla pero no decrece la desigualdad». MIGUEL, Jesús de, *Estructura y cambio...*, *op.cit.*, p. 304. Por tanto como criticara el economista Juan Francisco Martín Seco: «No tiene nada de extraño que en este período la mayoría de los pensionistas hayan perdido poder adquisitivo. Es posible que la única política redistributiva aplicada por el Gobierno se haya realizado dentro de estas partidas. Política muy ‘sui generis’ consistente en reducir la prestación a los pobres para incrementar la dotación a los paupérrimos». MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Quiebra del modelo económico español” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 149.

³¹⁸ GONZÁLEZ CALVET, Josep, “Prestaciones sociales, eficiencia y equidad. Análisis del gasto de protección social en España, 1982-1992” en *ibidem*, p. 256.

³¹⁹ Nos remitimos de nuevo a lo expuesto en lo apuntado en la *nota 289*.

³²⁰ Sobre el *chantaje social*, consúltese, RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El gobierno imposible...*, *op.cit.*, pp. 48-ss. Por ejemplo, los sindicatos tras la huelga del 28 de mayo de 1992 denunciarían públicamente «la actitud de cerrazón y prepotencia por parte del Gobierno que está dispuesto a negociar todo siempre que no se cambie absolutamente nada». AHFFLC, UGT-CCOO, “Declaración sindical”, Madrid, 28 de mayo de 1992, sig. 1600-008, p. 1.

La primera de las huelgas sería convocada ante el avanzado proyecto de reforma de las pensiones que, entre otras cuestiones, incrementaba el periodo cálculo de 2 a 8 años³²¹. Se argumentó en aquellas ocasión que se trataba de un “sistema desbocado” en lo económico, producto de las reformas de los gobiernos de la UCD. Insostenible, además, ante la situación económica por la que atravesaba el país. Pero a su vez se remarcaron con especial insistencia lo que se conoció en su día como los “fraudes pavorosos en las pensiones por invalidez”. O más coloquialmente como la “compra de pensiones”³²². Acusaciones, por cierto, que, en momento alguno, se tuvo necesidad de fundamentar empíricamente. En cuanto a las *amenazas*, explícitas o implícitas, los intentos de algunos ministros de ir más allá de los ajustes requeridos e introducir sistemas mixtos públicos/privados³²³. Como finalmente en parte sucedió, dos años después cuando se aprobaría la Ley 8/1987, de 8 de junio, *de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones*³²⁴. Amenazas, no obstante, acompañadas de “recompensas”, pues a pesar de las dificultades económicas se pretendía “hacer calar el mensaje de la bondad del nuevo sistema de pensiones”³²⁵.

La segunda tendría lugar el 28 de mayo de 1992, y tan sólo se convocaría un paro de media jornada —exceptuando Baleares y Murcia con una convocatoria de 24 horas—. En esta ocasión, la misma estaría motivada por el decreto que recortaba drásticamente las prestaciones por desempleo y por el proyecto de Ley de Huelga que nunca llegaría a legislarse³²⁶. El contexto

³²¹ En resumidas cuentas la aprobación de esta reforma «supuso una importante pérdida de derechos futuros de buena parte de los asalariados activos, equivalente a una reducción efectiva de 1,5 puntos de la participación futura de las pensiones en el PIB. A corto plazo, se redujeron en términos reales las nuevas pensiones». GONZÁLEZ CALVET, Josep, “Prestaciones sociales, eficiencia y equidad. Análisis del gasto de protección social en España, 1982-1992” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 253

³²² No son pocas las referencias. Nos limitaremos a dos. Primero, la de Joaquín Almunia: «Se producían fraudes pavorosos en las pensiones por invalidez. En algunas provincias de España, parecía que había habido una guerra, dado el número de inválidos que registraba y de cómo había ido creciendo la cifra de los últimos años. Se daba también el proceso llamado ‘compra de pensiones’ por el que, cotizando lo mínimo —dos años para la base reguladora de la pensión, y diez años de cotización a lo largo de toda la vida laboral—, ya se tenía derecho a la pensión. Y como había un complemento de mínimo, era una pensión mucho más cara que la que se había cotizado. Con diferencia. Era necesario, entonces, introducir medidas de ajuste, y empezamos a discutir». En declaraciones a IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, pp. 160-161. La segunda de Carlos Solchaga: «Había que corregir el sistema, sobre todo porque se había puesto de moda la compra de las pensiones. Es decir, gente que había pagado cantidades ridículas, fundamentalmente pequeños comerciantes y trabajadores autónomos, pagaban cantidades normales en los últimos dos años de su vida activa a la Seguridad Social y conseguían que cada peseta que ponían representara doce o trece mil pesetas para el resto de sus vidas». Declaraciones de Carlos Solchaga en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, *op.cit.*, p. 157.

³²³ «Yo presenté los primeros informes en el Consejo de Ministros. Se los presenté a Felipe y a Boyer. Naturalmente, Boyer quería ir mucho más allá. Quería hacer un ajuste del sistema mucho más fuerte y rebajar las pensiones [...]. Aquella fue una batalla tremenda [...]. Pero no quería la reforma de pensiones que sugerían desde Economía y no me quedó más remedio que hablar con Felipe directamente [...]. Y, al final, casamos la reforma que yo quería, aunque Comisiones Obreras y Nicolás Redondo plantearon algunos problemas». Joaquín Almunia en declaraciones a IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 161.

³²⁴ Ley 8/1987, de 7 de junio, *de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones*. Véase, asimismo, lo apuntado en el Capítulo 7, *nota* 92.

³²⁵ Joaquín Almunia en declaraciones a IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, pp. 160-161. El mismo político reconocería, a su vez, que durante el trámite parlamentario el Gobierno pecaría de «despotismo ilustrado». *Ibíd.*

³²⁶ Un proyecto de Ley de Huelga elaborado unilateralmente por el Gobierno de la nación y que tras la huelga de 1992 y otros conflictos de calado quedaría como uno de otros tantos ‘grandes’ proyectos que terminarían en un algún cajón. No era la primera ni la última vez que salía a *relucir* tal propuesta. Téngase presente además el Derecho de Huelga se encuentra reconocido en la Constitución en el artículo

económico en plena recesión ayudaba a introducir, de nuevo, aquello de la insostenibilidad del *sistema* y de su gran costo, con el latiguillo añadido, de su *no viabilidad*. Pero al mismo tiempo, se volvía a extender la idea del fraude que cometían los parados³²⁷. “No compraré la paz social a costa de desvirtuar los objetivos del Plan de Convergencia”, afirmaría el propio Carlos Solchaga en una muestra más de su conocida prepotencia personal-política³²⁸. Mismos argumentos en distintos momentos pero con un fin concreto: la reducción del gasto social que dificultaba alcanzar la deseada meta de la racionalidad económica.

En uno y otro caso, las huelgas generales no frenarían tanto la aprobación de la Ley 26/1985, de 31 de julio, *de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social*, ni el Real Decreto-Ley 1/1992, de 3 de abril, *de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo*, convertido tras el trámite parlamentario en la, Ley 22/1992, de 30 de julio, *de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo*.

28.2 y en él se recoge la futura elaboración de una ley que la regule. [«Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho, establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad»]. De hecho, tanto para la época socialista como hasta el presente histórico vivido, todavía tal derecho se sigue regulando a través de la Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, *sobre Relaciones de Trabajo* [B.O.E. 9 de marzo de 1977]. En concreto, el proyecto enviado al Congreso puede leerse en: CORTES GENERALES, *Proyecto de Ley Orgánica de Huelga*, Barcelona, Difusora de Normas Jurídicas, 1993. Un análisis concienzudo sobre el mismo en, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio, *El proyecto de Ley Orgánica de Huelga: la huelga en los servicios esenciales de la comunidad como telón de fondo*, Santander, Universidad de Cantabria, 1993. Una necesaria como aclaratoria visión de corte general en, MONEREO, José Luis, “Huelgas generales: fundamento, legitimidad y dinámica de tutela. Reflexiones iuslaborales”, *Aranzadi Social*, vol. III, n° 3, (2010), pp. 11-17. Y asimismo, ALONSO OLEA, Manuel, “A propósito del proyecto caducado de ley de huelga”, *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, vol. XLV, n° 70, (1993), pp. 413-448; y, DIÉGUEZ CUERVO, Gonzalo, “Aplicaciones del derecho de huelga en el Proyecto”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, n° 17, (1993), pp. 59-63. Por lo demás, véase, el apartado “9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. *Los arduos inicios de la flexibilización* (octubre 1976-marzo 1980)”, y el apartado “11.2.1. El mapa del conflicto obrero: datos, interpretaciones y demás evidencias del «caso español» en perspectiva internacional”.

³²⁷ De gran importancia unos años más tarde sería la publicación de un siempre citado estudio: UNIDAD ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, *Informe sobre el fraude en España*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994. En torno a las funciones de la citada unidad nos remitimos a, Resolución, de 19 de octubre de 1993, *de la SubSecretaría, por la que se dispone la publicación del Consejo de Ministros, de 4 de agosto de 1993, por el que se constituye la Unidad Especial para el Estudio y Propuestas de Medidas para la Prevención y Corrección del Fraude* [B.O.E. 20 de octubre de 1993]. Y sobre su contenido consúltese la oportuna síntesis del citado informe que sería elevado al Consejo de Ministros por parte de, BRAVO PAIVA, Manuel, “Informe de la Unidad Especial para el estudio del fraude: síntesis de su contenido”, *Cuadernos de Actualidad*, vol. V, n° 6, (1994), pp. 217-227. Por otra parte, consúltese el muy completo trabajo de, CEBRIÁN, Inmaculada, GARCÍA, Carlos, MURO, Juan, TOHARIA, Luis y VILLAGÓMEZ, Elizabeth, *Protección social y...*, *op.cit.*; así como, ADELANTANDO, José, NOGUERA, José Antonio y RAMBLA, Xavier, “Las políticas de protección social: sistema de pensiones y prestaciones por desempleo” en GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), *Políticas públicas en...*, *op.cit.*, pp. 200-222. De cualquiera de las formas, la *idea-fuerza* de un extendido fraude por parte de los trabajadores, empleados y/o desempleados, ha sido la tónica en la mayoría de las publicaciones académicas generalistas al respecto, aunque nuevamente haya que lamentar la falta de datos, de contrastación empírica en otras palabras. Un ejemplo harto significativo: «El decretazo también permitió reducir los gastos en prestaciones por incapacidad laboral transitoria, que había saltado de los 260.000 millones de 1988 al medio billón en 1992, crecimiento atribuible en no escasa medida a un aumento tolerado del fraude». POWELL, Charles, *España en democracia...*, *op.cit.*, p. 438.

³²⁸ Declaraciones procedentes de, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 167.

Detenernos –aunque sea brevemente– en ambas normativas en relación a su *Exposición de Motivos* como a parte de su articulado, puede resultar altamente ilustrador de lo hasta ahora dicho. Primero, en el caso de la Ley 26/1985 se comenzaba afirmando:

«Desde los años iniciales de la crisis económica ha sido constante y generalizada la opinión de que la Seguridad Social está necesitada de profundas reformas, punto sobre el que, puede afirmarse, existe hoy una práctica unanimidad por parte de las fuerzas sociales y políticas representativas.

Pero el ya muy largo proceso indicado ha hecho que los desequilibrios en el Sistema estén actuando negativamente sobre la economía y el empleo y poniendo el peligro el propio éxito de la reforma que se está abordando, en orden a garantizar su viabilidad y particularmente el mantenimiento del nivel y necesaria actualización de las pensiones».

La traducción del *discurso socialista* al respecto de la *política progresista de salida a la crisis*, encontraba aquí su perfecta traslación. Como también se podía observar en el empleo de otro de sus *clásicos* puntos de apoyo cuando se afirmaba como tales reformas ya han ocurrido en otros países de nuestro entorno”. Acompañándose lo anterior con un repertorio de las bondades tanto de la política económica emprendida como de la citada Ley que perseguía “un sistema protector más justo, eficaz y completo”. Tras asegurar, lo que no era baladí en cualquier caso, como las “pensiones serán actualizadas cada año según la evolución del Índice de Precios al Consumo” a la par que se garantiza, por tanto, “el poder adquisitivo de sus pensiones”; venían las correspondientes justificaciones y argumentos mantenidos durante los meses de negociación y tramitación parlamentaria de cara a *explicar* los porqués de la elevación del periodo de cotización. Todo ello bajo la égida de la *solidaridad*:

«[A]l mismo tiempo, el incremento del periodo de carencia y la modificación del cómputo de la base reguladora supone una garantía de que se tiene en cuenta realmente la vida laboral del trabajador, evitando simultáneamente el fraude que se venía ocasionando, en especial en determinados Regímenes Especiales, que favorecían la práctica insolidaria de la compra de pensiones, haciendo recaer, en definitiva, el coste del fraude sobre los demás trabajadores y pensionistas».

Por si faltaban dudas de las *bondades* que los sindicatos se negaban, por activa o pasiva, a aceptar, se decía: “Refuerza, por último, el carácter redistributivo del sistema, reordenando, las prestaciones familiares mediante la concentración de la ayuda en las familias con menores ingresos o mayor desprotección, pudiendo esta ir destinada a desempleados subsidiarios, pensiones y trabajos en activo con bajas rentas”. Asimismo se anunciaría la intensión de caminar “hacia un nuevo modelo universalista y unitario de protección social” para el que, sin embargo, no se concretaba plazo alguno. Así pues, mediante el artículo 1 se procedía a elevar a 15 años el periodo de cotización mínimo para el acceso a las pensiones, así como se modificaban las bases reguladoras a través del artículo 3, entre otras no pocas medidas, que en momento alguno, serían aceptadas por los principales representantes de los trabajadores³²⁹.

En el segundo caso, el contexto en donde se aprueba el Real Decreto-Ley 1/1992 se ha de vincular a políticas que se pondrán en marcha de cara a la *salida de una nueva crisis económica* por parte de los ejecutivos socialistas –aunque ya entonces no se emplearía el término “progresista”–. Una normativa que, en parte, constituye un *intento de rectificación* de

³²⁹ Ley 26/1985, de 31 de julio, *de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora*. Desarrollada a través del Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre, *para la aplicación de la Ley 26/1985, de 31 de julio, en la materia de racionalización de las pensiones de jubilación e invalidez permanente* [B.O.E. 5 de octubre de 1985]; y del Real Decreto 2364/1985, de 18 de diciembre, *por el que se regula el complemento familiar por hijo a cargo de menores ingresos del beneficiario en el sistema de la Seguridad Social* [B.O.E. 21 de diciembre de 1985]. Normativa derogada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social* [B.O.E. 29 de junio de 1994]. Un estudio de referencia central en, DESTENTADO, Aurelio, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Bernardo y GONZÁLEZ-SÁNCHO LÓPEZ, Emilio, *La reforma de las pensiones de la Seguridad Social: un comentario sistemático a la Ley 26/1985, de 31 de julio*, Madrid, Civitas, 1986.

los perniciosos costes de sus propias políticas económicas y laborales. Periodo de rectificación, empero, con una marcada orientación liberal. Por más que los argumentos presentados no varíen en lo fundamental de los anteriores presentados en otras ocasiones, no sería así en la respuesta que se pretende dar a una situación marcada por la creciente elevación del desempleo y, por consiguiente, de incremento de los gastos asociaciones a la protección por desempleo³³⁰.

De entrada, y tras constatar la “difícil situación en el mercado de trabajo” pero sobre todo un “preocupante desequilibrio financiero en el sistema de protección por desempleo”, se volvería a *justificar* aquel un considerable recorte de derechos en pos de la racionalización del “gasto en protección por desempleo”, y, cómo no, de cara a asegurar el “equilibrio financiero”. Ya en aquellas alturas, a principios de 1992, la *cultura de la temporalidad* llevaba un amplio tiempo instalada como una realidad dentro del mercado de trabajo, con los efectos negativos tantas veces indicados. Así se buscaría, en primera instancia, incentivar la “contratación por tiempo indefinido” de los colectivos más afectados –en lo básico, jóvenes, trabajadores de más de 45 años y mujeres– por el paro de larga duración y con graves problemas para su inserción.

Si por aquí por más que se reaccionara tarde de cara a modificar algunos de los parámetros de las políticas de empleo, en la práctica, el objetivo central sería frenar los costes presupuestarios asociados en materia de prestaciones ante los altos niveles de rotación de trabajadores temporales. En aquella ocasión, tampoco faltaría la buena voluntad de legislador, cuando se hablaba de todo un conjunto de incentivos que se reservarían para “la creación de empleo neto”, con el tan bien noble fin de frenar el “fraude de ley” que suponía todo un amplio conjunto de prácticas extendidas por parte de los empleadores.

La principal vía de solución que se diseñaría pasaría por un muy sustancial recorte de la duración y pago de la prestación por desempleo, a la par que se modificaría la escala de los periodos de cotización así como los tipos “aplicables a la base reguladora”. Recortes que se expondrían con claridad en el Capítulo II –y en concreto en el artículo 5 y el artículo 9, entre otros– a partir de los cuales se incrementaba el periodo de cotización al doble para acceder a la prestación, a la par que se disminuía las cuantías a cerca de la mitad. Una vez más se volvía a repetir una historia tantas veces consabidas: a pesar de que los trabajadores temporales no tenían responsabilidad por su propia situación laboral, el recorte racionalizador y equilibrador se cebaba, precisamente, en los segmentos más débiles del mercado laboral.

Todavía se daría otro notable paso en la creciente *culpabilización* o al menos extensión de “sospecha” de los trabajadores por su propia situación de desempleo. Si ya en el artículo 10 se modificaran los criterios de *colocación adecuada*, por el artículo 11 se limitaba enormemente la autonomía personal del trabajador a la hora de poder rechazar una oferta de trabajo, pues tal decisión podía conllevar la “extinción de la prestación en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, *de Infracciones y Sanciones en el Orden Social*”³³¹. Un último artículo que desataría las *iras sindicales* y que, en buena medida, estaría tras la convocatoria de la huelga general del 28 de mayo de 1992³³².

Por lo demás, y más allá de la guerra de cifras habitual de seguimiento o de su coste económico –para la de 1985, según siempre estimaciones oficiales, fue de 34.000 millones de

³³⁰ Ley 31/1984, de 2 de agosto, *de protección por desempleo, por la que se modifica el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre* [B.O.E. 4 de agosto de 1984]. Sobre su puesta en marcha, su análisis legislativo así como sus resultados se volverá en el este mismo apartado unas páginas más adelante.

³³¹ Ley 8/1988, de 7 de abril, *de Infracciones y Sanciones en el Orden Social* [B.O.E. 15 de abril de 1988].

³³² Real Decreto-Ley 1/1992, de 3 de abril, *de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo*; Ley 22/1992, de 30 de julio, *de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo* [B.O.E. 4 de agosto de 1992]. Sobre esta cuestión nos remitimos a, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La primera etapa...”, *op.cit.*

pesetas, y para la de 1992 de 30.000 millones de pesetas³³³ – estas convocatorias –junto con la el 20 de junio de 2002 contra la nueva reforma del sistema de protección del desempleo y la Ley Básica de Empleo³³⁴– ejemplifican claramente como el cuestionamiento de la viabilidad del sistema de protección social, en su doble y principal vertiente –desempleo y pensiones– ha sido el motor, junto con las reformas laborales, de los conflictos obreros más importantes en democracia.

Estos episodios históricos, junto con otros tantos que se podían citar, reflejan las *dudas*, la ausencia de un proyecto claro y definido en cuanto a la construcción de un Estado Social avanzando. En “nombre” de la *modernización*, de la *racionalidad* y de la *eficiencia* económica, la tensión permanente de cara a limitar –“adecuar” a la realidad económica sería la expresión más repetida por parte de los socialistas– se constituiría en una realidad histórica. Exceptuando, eso sí, el corto y limitado, pago de la “deuda social”. Las razones y los argumentos de cara a contener el gasto social variaron en el tiempo, a la par que se fueron introduciendo nuevos hasta derivar a partir de 1993 y 1994, con Pedro Solbes en el Ministerio de Economía, a posiciones radicalmente ofensivas contra los derechos de los trabajadores y el estado del Bienestar.

En resumen, los datos macroeconómicos, los conflictos obreros, en conjunto o por separado, muestran la permanente lucha política y social por la conquista de unos derechos fundamentales y su aplicación en el terreno socio-laboral. Si primero, nos preguntamos si fue realmente *solidaria* y *progresista* la política socialista, en segundo lugar, debemos interrogarnos si realmente fue social. O incluso dando un paso más, favorecedora de los intereses de la clase trabajadora. En este terreno también difícilmente puede ser así calificada [consúltese en el “anexo” la *Tabla 130*, la *Tabla 131* y la *Tabla 132*].

El *precio de la modernización* más costoso, en términos históricos, sería el referido a la profunda metamorfosis por la que atraviesa el mercado de trabajo³³⁵. Hablar y/o definir la transformación del sistema laboral de esta forma puede parecer cuando menos exagerado. No

³³³ Datos tomados de, Noticia, “La huelga general contra la reforma laboral será la séptima de la democracia”, *La Vanguardia*, 14 de junio de 2010.

³³⁴ La misma sería convocada ante la aprobación del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, *de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad* [B.O.E. 25 de mayo de 2002]. Normativa cuya entrada en vigor se produciría un 27 de mayo y que estaría vigente hasta el 14 de diciembre de 2002 cuando se publicaría la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, *de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad* [B.O.E. 13 de diciembre de 2002]. En cualquier caso, debe destacarse como a pesar de la ‘teórica’ victoria sindical –alcanzada por el éxito que supuso el desarrollo de la citada huelga general– que frenaría, en un principio, los elementos más agresivos contra los derechos de los trabajadores; en la posterior negociación y gestión de la Ley 45/2002 se terminarían ‘colando’ algunos aspectos técnico-jurídicos en materia de despido –los llamados “salarios de tramitación”– que harían del mismo, en la propia práctica empresarial, libre y prácticamente gratuito. Véase lo apuntado por dos especialistas en dicha materia: VALDÉS-DALRÉ, Fernando y LAHERA FORTEZA, Jesús, *La precariedad laboral...*, *op.cit.*; ALBIOL MONTESINOS, Ignacio y BLASCO PELLICER, Ángel Antonio, *Desempleo y despido en la reforma laboral del Real Decreto-Ley 5/2002*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002. Años más tarde el Tribunal Constitucional declararía el que sería conocido en su momento como el *decretazo* como anticonstitucional: TC. Sentencia 68/2007, de 28 de marzo de 2007. *Recursos de inconstitucionalidad 4781-2002 y 4915-2002 (acumulados)*. Promovidos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto del Congreso de los Diputados frente al Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, *de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad*. Límites a los decretos-leyes: inexistencia de situación de extraordinaria y urgente necesidad; potestad legislativa y diálogo social. Nulidad de disposición estatal [B.O.E. 26 de abril de 2007].

³³⁵ Una expresión para nada novedosa y de amplia utilización en las ciencias sociales francesas. A modo de ejemplo, CASTEL, Robert, *La metamorfosis de...*, *op.cit.*; o, GORZ, André, *Metamorfosis del trabajo...*, *op.cit.*

consideramos que esto sea así, por la evidente y sencilla razón de que se asistirá en estos años a una transformación cuantitativa y cualitativa que no tiene precedentes en la época contemporánea del país. Aunque en nuestro estudio de caso –Epígrafe IV, *Historia de una reforma laboral*– se tratará profusamente este aspecto, desde sus más variadas vertientes y perspectivas, en este análisis global no puede faltar un conjunto de mínimas referencias centrales que dejen ya apuntadas las líneas maestras de desarrollo.

El efecto combinado de la liberalización e internacionalización de la economía, del cambio del modelo productivo y de la propia flexibilización del mercado laboral, tendrá un conjunto de sobresalientes resultados directos. Desde una perspectiva histórica, que no se queda en los simples datos de un momento u otro, primero, se asiste a la dualización del mercado de trabajo; segundo, al nacimiento, extensión y consolidación de la “cultura de la temporalidad empresarial” –junto con su prolongación en el tiempo, “la cultura empresarial de la precariedad” – con su efecto *ad hoc* de la aparición de la precarización laboral como fenómeno transversal e interclasista; y tercero, se producirá *de facto* la ruptura de la cohesión interna de la clase trabajadora y/o obrera. Tres fenómenos históricos inéditos de unas implicaciones internas y externas al mercado de trabajo que deben calibrarse oportunamente. Pero también desde el lado de las cifras se nos aparece un escenario repleto de cambios, de transformaciones, de mutaciones, en suma, de la realidad laboral del país.

Una vez más se ha de proceder a establecer una clara línea de separación entre los discursos políticos, periodísticos, sociológicos de su presente histórico concreto y lo que señalan las siguientes *Tablas y Gráficos*. Vayamos con los datos.

El “arte” de contar parados/desempleados, a la *mejor luz posible*, se convertiría en una refinada técnica político-económica por parte de los técnicos y dirigentes socialistas –por este orden y no otro–³³⁶. Un mundo de cifras que no sólo escondían la dura realidad vital de millones de personas, sino es que además su más estricta cuantificación –probablemente como en ningún otro aspecto– reducía una complejidad estadística y humana importantísima, a elaborados discursos justificativos sobre los “éxitos” de la modernización. Ejemplo de ello, sería la utilización partidista, según la coyuntura, por parte de los gobiernos socialistas de los datos del INEM y de la EPA. Aquí entraba tanto la instrumentalización estadística como la manipulación política pura y dura sobre la “fiabilidad” de estas mismas encuestas.

En aquel mismo tiempo en no pocas ocasiones se recordaría una conocida frase: “Una estadística convenientemente torturada acaba por confesar todo”³³⁷. Un ejemplo claro: el propio Ministro de Economía, Carlos Solchaga, llegaría a señalar por escrito, no en ningún tipo declaración pública siempre sometida al imperio de la coyuntura del momento en como a pesar de que la EPA se trataba de una “encuesta metodológicamente impecable, tan buena como cualquier otro país”; sin embargo, el “problema está más bien en la definición del

³³⁶ No sólo sería en el campo del empleo/desempleo, donde los «trucos de magia» como lo calificarían Carmen Tomás e Ignacio Alonso se emplearía, así mismo tendrían su correlato con respecto a la inflación, el déficit público... Véase, TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador...*, *op.cit.*, p. 175. Véase también lo apuntado en la *nota 11*.

³³⁷ Por su parte, UGT en una clara y rotunda denuncia de las actitudes de los técnicos y políticos socialistas con respecto a este grave problema señalaría: «Está claro que el paro no se puede reducir a un debate estadístico. Camuflar la problemática del paro con disquisiciones sobre el concepto de parado o la relevancia de unos miles es una frivolidad inaceptable de un gravísimo problema que afecta de hecho a varios millones de españoles de forma directa o indirecta. Esta actitud es, además, incomprensible en los que son, de facto, los responsables últimos de la bondad o maldad de las estadísticas de este país». AHFFLC, UGT, “Reflexiones de UGT para un compromiso de progreso por el empleo”, Madrid, 1988, sig. 001874-002, p. 13. Por lo demás consúltese uno de los múltiples ejercicios socialistas de instrumentalización de las cifras estadísticas sobre el empleo/desempleo en, AHFPI, PSOE-CEF, “La política social (1983-1987)”, Madrid, abril de 1988, sig. Fc 6817.

desempleo”³³⁸. Afirmaciones contradictorias de quien había ostentado el poder político para, en su caso, solventar este problema “técnico” que, según el propio interesado, siempre tendía a sobrevalorar estadísticamente el paro realmente existente. Afirmaciones que no resisten la menor contrastación empírica, si nos limitamos a interpretar la realidad en su nivel más superficial³³⁹. De cualquiera de las formas ambas bases estadísticas –tanto la ofrecida por el INEM como por el INE– a partir de sus diferentes metodologías y periodos de publicación de resultados irían ofreciendo sucesivos “retratos” sobre la realidad del mercado de trabajo – mensuales o trimestrales, respectivamente– reconvertidos en la práctica en meras *notas de prensa* así como las correspondientes *ruedas de prensa*.

Los datos sobre los parados –siempre en miles de personas, en miles de millones de pesetas en términos de *coste económico*– reflejarían también una batalla político-electoral inclusive antes que socioeconómica, de cara a la legitimación del proyecto gubernamental socialista. Sus alcances no fueron menores.

Como se ha dicho en más de una ocasión, muchas de las decisiones políticas de los gobiernos socialistas pueden y deben ser discutidas, desde su salida liberal/clásica a la crisis económica, los costes de la liberalización e internacionalización o la falta de flexibilidad en lo que respecta a las medidas adoptadas frente a la inflación. En cambio, desde una perspectiva de lo histórico en clave social, de lo que aquí se está hablando es de los propios sujetos que conforman el meollo de la historia. La gran mayoría social anónima. A saber, los *peatones de la historia* de los que hablará Manuel Vázquez Montalbán.

Por esta misma razón, no se trata tan sólo de evaluar líneas de tendencias, cifras en bruto o en porcentaje, sino que ha de tenerse siempre presente sus implicaciones sociales. Además –como también señalábamos unas líneas más arriba– si un apartado a historiar es ampliamente cuestionable en esa línea que ha tendido a valorar positivamente la gestión de los gobiernos socialistas, es éste y no en otro. Y no son pocos los apartados en donde las políticas socialistas dejaron sus respectivas *huellas* a medio y largo plazo.

La idea y defensa de la centralidad histórica de las relaciones capital-trabajo no es una simple e inclusive bella frase para la posterioridad. Se trata de un concepto transversal, clasista y por lo demás de una necesidad histórica indudable, que pone el acento en la importancia de las relaciones laborales como el centro del meollo del desarrollo intrínseco de las sociedades. Así de sencillo.

Por tanto, desde las perspectivas aquí señaladas, por el momento, nos conformaremos en delimitar estrictamente a nivel cuantitativo, las principales características de la metamorfosis del mercado laboral. Lo que no es poco. Tres interrogantes, por lo menos, han de ser contestados: ¿Durante la “década del cambio” cuanto empleo se creó? ¿Cómo evolucionaron tanto las tasas de desempleo así como las tasas de participación? ¿Qué grupos se vieron más afectados en el proceso de cambio global y la consiguiente reestructuración del modelo productivo? Preguntas esenciales, básicas, objetivas sin más intención normativa que la de retratar las grandes variaciones de este tiempo. Más adelante otros tantos interrogantes sobre el tipo de empleo, su duración e inclusive su calidad serán atendidos oportunamente.

Al finalizar el año noventa y dos había más de un millón y medio de asalariados trabajando que en el ochenta dos, según datos de la propia Contabilidad Nacional³⁴⁰. No sólo,

³³⁸ SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, op.cit., pp. 159-160, *nota sin numeración*. Sobre esta misma cuestión revítese los apuntes aportados en su día por, GARCÍA SÁINZ, Cristina, “Revisión de conceptos en la Encuesta de Población Activa”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 61, (1993), pp. 173-184.

³³⁹ De nuevo remitimos a la *nota 11*.

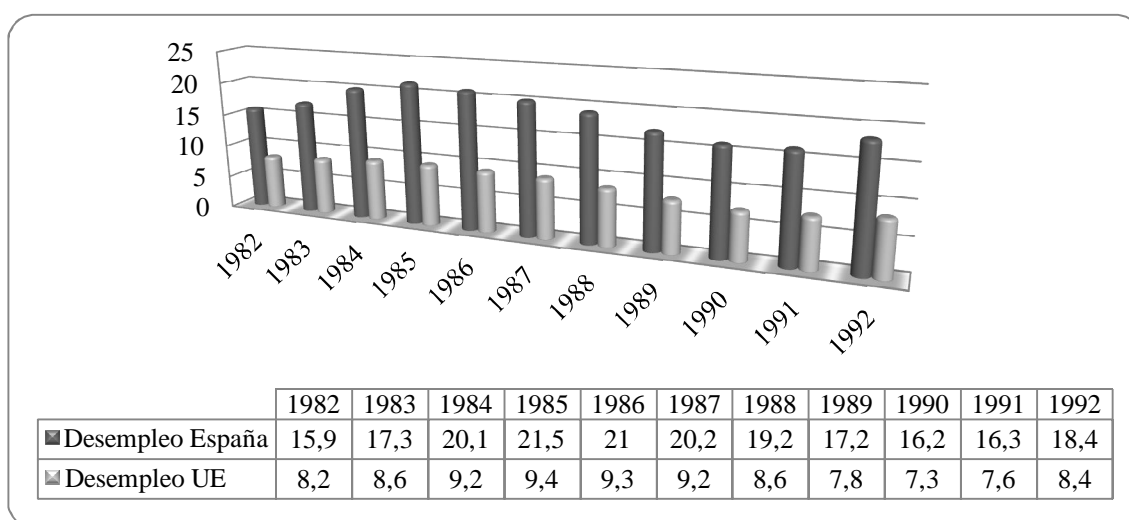
³⁴⁰ Todas las ‘cifras’ están tomadas de dos *informes institucionales/oficiales*. Trabajos centrales para el estudio del mercado de trabajo español. Ahora bien, como se ha remarcado previamente se trata en ambos casos de informes encargados por diferentes administraciones y por lo tanto sujetos a unos

pues, tanto el empleo total como los trabajadores en alta en la Seguridad Social –indicadores de primer nivel– confirmaban estos positivos datos. Una evolución que había ido en paralelo a los ciclos económicos. Si redujéramos estos datos a una única realidad estadística cabría hablar de un “éxito” no *relativo* sino *absoluto* de la estrategia de la modernización. Pero la realidad económica nunca es tan sencilla. El contrapeso viene, lógicamente, de la otra cara del mercado de trabajo: el desempleo.

Se ha repetido también hasta la saciedad como en estos años se asiste al proceso de transformación de un desempleo coyuntural –característico del franquismo para más señas– a uno de tipo estructural. Se cierran estos diez años con 2.259,900 de desempleados. Sin ser las cifras más altas para toda la década, e inclusive para los catorce años de los gobiernos socialistas, representan, sencillamente, la mayor cifra de la Unión Europea.

Basándonos en los datos de Eurostat, que ofrece a través de su particular metodología siempre unas cifras más bajas que la EPA y/o el INEM, la conclusión, en definitiva, es clara: durante estos años nunca se bajaría de la barrera del 15% –una barrera psicológica consolidada en nuestro marco de actuación– y siempre muy por encima de las medias europeas anuales como se representa en el *Gráfico 26* –complementése la misma, primero, con la *Tabla 93*, y segundo, contrástese también con el *Gráfico 27* incluidos en el *anexo*, y contruidos ambos a partir de los datos de la EPA–. Dicho de otra forma: nunca se descendería de los dos millones de parados –*Tabla 137*– [consúltense también en el “anexo” la *Tabla 136*, la *Tabla 138* y el *Gráfico 27*].

Gráfico 26. Evolución comparada de la tasa anual de desempleo en España y el UE, 1982-1992 (%)



Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Por tanto, una primera respuesta doble se puede ofrecer: aunque hablar de “fracaso” de las medidas socio-laborales y jurídicas aplicadas durante este tiempo, en estrecha comunión con la estrategia de la modernización económica, pueda ser cuestionable e inclusive constituir una afirmación “fuerte”; una sociedad y una economía “moderna” que tiene tan altas de desempleo difícilmente se puede escapar a este adjetivo³⁴¹.

criterios y unas orientaciones políticas muy concretas: SEGURA, Julio, DURÁN, Federico, TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel, *Análisis de la..., op.cit.*; CRUZ VILLALÓN, Jesús, DURÁN, Federico, JIMENO, Juan Francisco, OLALLA, Miguel Ángel, RUESGA, Santos M., SÁEZ, Carmen, TOHARIA, Luis y VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, *Más y mejor empleo..., op.cit.*

³⁴¹ Desde instancias gubernamentales, lógicamente, ‘fracaso’ no sería la palabra más empleada. A lo sumo se llegaría a hablar de ‘insatisfactorio’. Todo ello además con una *cuña explicativa* no menor. Pues junto a la idea del fraude que cometía el *supuesto* desempleado que cobraba subsidio y trabaja en *negro*, el problema de tan altas tasas de desempleo venía dada, en gran medida, por los problemas

No es tanto en el terreno *ético* –o puestos a la tarea en el *estético*– sino en el estrictamente político en el que nos movemos. Se pudiera exponer como contrapeso –así lo hicieron los propios socialistas³⁴²– los millones de puestos de trabajo creados –se calcula que en el periodo de mayor expansión entre 1985 a 1991 se generaron 1.800.000 de puestos de trabajo, prácticamente un millón más que los 800.000 puestos prometidos para la I Legislatura– pero dar verosimilitud a tal argumento, estaría fundamentado en muy pobres razones. En el frente de las cifras se puede llegar a argumentar prácticamente todo, como, por ejemplo, que esos prácticamente dos millones de puestos de trabajo se destruyeron en menos de tres años durante la crisis de los noventa³⁴³.

Pero en el campo de las interpretaciones no resulta tan fácil. Y es así, porque los socialistas a través de una infinidad de medidas generarían no en la *teoría* sino en la *práctica*, las “condiciones necesarias” para la creación de empleo aunque fuera al precio de la flexibilización y/o precarización. Aquí, de nuevo, la hipótesis de la imposibilidad de la “cuadratura del círculo de la modernización” socialista se verifica³⁴⁴. No sólo es que el modelo económico adoptado se demostrará débil, inestable, sujeto a los ciclos económicos, sino es que dentro del mercado nacional de trabajo aquello tuvo su oportuna traslación tanto en la incapacidad de crear el empleo suficiente para la demanda total, como en lo relativo a su principal debilidad: la estabilidad del empleo. Es decir, no frenó en ninguno caso –cuando no profundizó– uno de los fenómenos característicos de nuestro mercado: la rápida destrucción neta de empleo en el momento en que el ciclo económico no era favorable.

estadísticos. Una explicación cuando menos poco convincente de quienes se les supone que estaban encargados de resolver este tipo de problemas técnico-metodológicos. «¿Representará esto un problema social para España imposible de tolerar? Eso depende de muchas cosas, entre otras de manera muy importante de que las cifras de empleo y desempleo que estemos utilizando en nuestros cálculos reflejen o no adecuadamente la realidad de la situación del mercado de trabajo. Si, como sugieren algunas consideraciones críticas de la Encuesta de Población Activa, la cifra de empleo está subestimada y la tasa de paro sobrevalorada, entonces un 10 por ciento de desempleo así medido puede representar en torno al 7 por ciento del conjunto de la población activa, lo que resultaría una cifra aceptable por comparación a las que se han registrado en los últimos dos decenios en el continente europeo. Aceptar, sin embargo, una cifra de desempleo entre el 7 y el 10 por ciento sólo es posible si nos resignamos ante una situación que desde todos los puntos de vista es insatisfactoria». SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, *op.cit.*, p. 173. Una visión crítica sobre todo este entramado político-discursivo en el muy recomendable trabajo colectivo dirigido por: SANCHIS, Enric y MIÑANA, José (eds.), *La otra economía...*, *op.cit.*. Véase el Capítulo 2, *nota 612*.

³⁴² En este caso concreto revítese entre la multitud de trabajos publicados por quien fuera Secretario General de Empleo, Álvaro Espina, los siguientes: ESPINA, Álvaro, *Empleo, democracia y...*, *op.cit.*; id., “Diez años en la vida de España. Las políticas laborales y de empleo” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*; id. “Estrategias de creación...”, *op.cit.*.

³⁴³ En primer término véanse los informes de, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Mercado de trabajo...*, *op.cit.*, en relación al año 1987; y más concretamente, los datos ofrecidos en el boletín del Ministerio de Trabajo, *Coyuntura Laboral*, n° 33, (1991). Junto con, INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, *Memoria 1990*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.

³⁴⁴ Al respecto Fernando Esteve y Rafael Muñoz hablarían en su día de las fundadas «razones para abandonar» el conjunto de políticas económicas seguidas. Y lo hacía a partir de un concepto de *eficiencia* radicalmente diferente a la de los técnicos socialistas: «El valor de lo alcanzado con una determinada política hay, pues, que ponerlo en relación con lo que podría haberse conseguido actuando de otra forma. Ahora bien, dado que en toda política económica subyace una determinada interpretación de la realidad: un modelo económico que la fundamenta y justifica; la evaluación que el analista haga de ella ha de fundarse en el juicio sobre la pertinencia del modelo que la justifica, ya que si ese modelo no es el más adecuado, la política que con él se instrumenta y que es presentada usualmente como ‘única’, inevitable’ y ‘eficaz’ deja de tener cualquiera de esas propiedades». AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002, p. 42.

Dentro de esta compleja y cambiante realidad social se generó, asimismo, un claro “modelo de ganadores/perdedores”. Un modelo que va mucho más allá de la simple constatación de la dualización laboral entre *insiders/outsiders*³⁴⁵. Sin entrar tampoco en mayores detalles, tanto las mujeres como los jóvenes, serían, por seguir empleando esta terminología, los *grandes perdedores* de este proceso de cambio social. Valga, igualmente, las siguientes dos evidencias estadísticas: sus altas tasas de desempleo así como sus bajos niveles de participación en el mercado de trabajo en comparación a cualquier otro colectivo³⁴⁶.

Realidades materiales, tras la cuales se ocultan una multiplicidad de situaciones: temporalidad, trabajo informal, pero sobre todo desempleo y exclusión socio-laboral. De hecho, con respecto sus tasas de participación siempre estarán por debajo de la media europea. Según los datos de Eurostat, para el año 1992, mientras que la tasa total europea era 67,3% la española era del 58,1%; la masculina era de 79,0% y el 76,9%, respectivamente; y la femenina del 55,6% y del 39,9%, respectivamente³⁴⁷.

Todavía más, pues, con ciclo o sin ciclo económico, la entrada en el mercado laboral siguió constituyendo una difícil tarea para no pocos demandantes de empleo³⁴⁸. La *Tabla 138* presenta unos datos a tener en cuenta, y que rara son evaluados en su justa medida: los demandantes de trabajo sin empleo anterior en relación al conjunto total del empleo total. Igualmente, una vez que se había logrado internarse en el mercado de trabajo, y *retornado* a la situación de desempleo, a partir del alto grado de rotación laboral que se origina en estos años, la salida de esta situación tampoco resultará sencilla³⁴⁹. En el *Gráfico 28* se representa el muy

³⁴⁵ Junto con lo apuntado a nivel teórico en la *Presentación*, véase la amplia bibliografía apuntada en el apartado “2.2.4. El mundo del trabajo y las relaciones laborales: un balance generalista”.

³⁴⁶ De cara al específico caso de las mujeres –pues de los jóvenes se hablará largo y tendido– véanse: OTERO GIRÁLDEZ, M^a Soledad y GRADÍN LAGO, Carlos Manuel, “Incorporación laboral de la mujer en España y su efecto sobre la desigualdad de la renta familiar”, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, n^o 47, (2001), pp. 226-247; MONDÉJAR JIMÉNEZ, José y MONTERO LORENZO, José M^a, “El empleo femenino en las regiones españolas: un análisis estadístico desde la perspectiva de la estrategia europea para el empleo”, *Cim.economía*, n^o 7, (2005), pp. 19-60. Y más concretamente muchos de los trabajos contenidos en un trabajo internacional de gran calado: MARUANI, Margaret, ROGERAT, Chantal y TORNIS, Teresa (coords.), *Las nuevas fronteras de la desigualdad: hombres y mujeres en el mercado de trabajo*, Barcelona, Icaria, 2000; y específicamente: TORNIS, Teresa, “Paro y tolerancia social de la exclusión: el caso de España” (pp. 311-326). Por último, un estudio clave traducido hace unos años: WARING, Marilyn, *Si las mujeres contaran: una nueva economía feminista*, Madrid, Vindicación Feminista, 2004. Compléméntese lo anterior con lo apuntado en el Capítulo 3, *nota 276*.

³⁴⁷ Como se recordaba desde la UGT a principios de los años noventa: «En definitiva, nuestro mercado de trabajo sigue manteniendo sus deficiencias estructurales: baja tasas de actividad, reducido nivel de empleo, baja tasa de salarización [...] y un altísimo desempleo. Consecuencia de ello, el número de personas con empleo en relación a la población en edad de trabajar es en España 10 puntos menor que la media comunitaria lo que nos confiere una situación diferencial muy delicada que también encierra grandes potencialidades de desarrollo de financiación de prestaciones sociales». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la C.E.C. al XXXV Congreso Confederal”, Madrid, 1990, sig. 0067-001, p. 16.

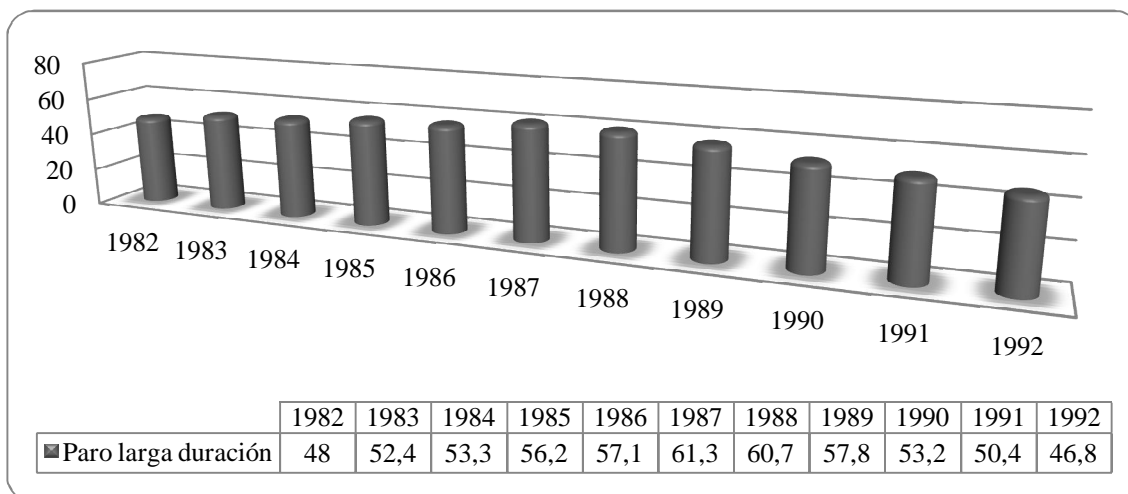
³⁴⁸ De enorme valor aclaratorio en cuanto a las etapas aquí tratadas, ARRELLANO GONZÁLEZ, Manuel, BOVER, Olympia y BENTOLILA, Samuel, “Duración de desempleo, duración de las prestaciones y ciclo económico”, *Estudios Económicos*, n^o 57, (1996), pp. 1-75.

³⁴⁹ En primer término, consúltase el trabajo estadístico de, GARCÍA PÉREZ, José Ignacio, “Las tasas de salida del empleo y del desempleo en España (1978-1993)”, *Investigaciones Económicas*, vol. XXI, n^o 1, (1997), pp. 29-53; y asimismo, SAMANIEGO, Carlos, “Absentismo, rotación y productividad” en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Andrés (coord.), *Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones*, Madrid, Pirámide, 1998, pp. 247-258. Todo ello junto con los datos aportados por, SÁEZ FERNÁNDEZ, Felipe, “Mercado de trabajo y rotación laboral” en CARABAÑA MORALES, Julio (coord.) y GARRIDO, Luis Joaquín (ed.), *Reparto de trabajo...*, *op.cit.*, pp. 233-252.

alto nivel de parados de larga duración en estos diez años. Prácticamente uno de cada dos desempleados registrados en las oficinas del INEM³⁵⁰.

A estos datos cabría añadir –aunque estadísticamente no es factible– a otros tantos demandantes potenciales que, por diversas circunstancias, no estaban inscritos. Nos referimos, en concreto, al conocido “efecto desánimo” / “efecto animación”³⁵¹. A lo anterior también habría que tener más que presente el *efecto de limpieza* estadística, a través de toda una serie de precisos instrumentos normativos con los que se modificarían los criterios metodológicos de las principales bases de datos, a la hora de cuantificación de los activos y no activos dentro del mercado de trabajo³⁵² [véase asimismo en el “anexo” la *Tabla 139*].

Gráfico 28. Evolución de las tasas anuales del Paro de Larga Duración, 1982-1992 (%)



Fuente: EPA, y elaboración propia.

³⁵⁰ Al respecto se ha de destacar muy especialmente el trabajo de fondo y con un material teórico, metodológico y estadístico extraordinario de, SANTOS ORTEGA, Antonio, *Trayectorias sociales del...*, *op.cit.*. Una tesis doctoral que dirigida por Carlos Prieto no sólo aborda la cuestión estrictamente cuantitativa sino que profundiza en las implicaciones sociales, económicas y culturales del problema del paro de larga duración. Unos años antes se publicaría una obra desigual: ALBA RAMÍREZ, Alfonso, ÁLVAREZ LLORENTE, Gema PAGÁN, Ricardo, *Parados de larga...*, *op.cit.*. A sumar también el informe de la OCDE, *Políticas para ayudar a los parados de larga duración*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993. Y sobre este amplio sector de población asalariada así como su vinculación con las zonas limítrofes de inclusión/exclusión social consúltense: TOHARIA CORTÉS, Luis, GARRIDO, Luis Joaquín y CEBRIÁN LÓPEZ, Inmaculada, “Los parados de larga duración y la protección social” en MORENO FERNÁNDEZ, Luis y PÉREZ YRUELA, Manuel (coords.), *Política social y...*, *op.cit.*, pp. 351-378. Por último consúltense una de las múltiples medidas instrumentadas por la Administración, junto con otras tantas, de cara a ‘combatir’ este grave problema socioeconómico y que a su vez resulta muy ilustrativa de las dimensiones del mismo: Real Decreto 2394/1986, de 14 de noviembre, *por el que se extiende transitoriamente el subsidio por desempleo a determinados colectivos de desempleados de larga duración* [B.O.E. 21 de noviembre de 1986].

³⁵¹ Difícil de estimar una cifra de forma aproximativa sobre todo teniendo presente el sistema metodológico de los años de estudio; así pues, se ha de recurrir a algunos estudios de casos básicamente orientados por la psicología del trabajo. A modo de manual para este tiempo y con numerosas referencias al respecto: AGULLÓ TOMÁS, Esteban y OVEJERO BERNAL, Anastasio (coords.), *Trabajo, individuo, sociedad...*, *op.cit.*. Todo ello junto con dos trabajos que no exentos de complejidad y en ocasiones poca claridad ayudan a entender estos ‘otros costes’ sociales *no visibles*. Nos referimos a, BLANCH RIBAS, Josep M., *Del viejo al nuevo paro: un análisis psicológico y social*, Barcelona, PPU, 1990; del mismo autor, id., *Desempleo juvenil y...*, *op.cit.*; y, desde una perspectiva más concreta, BERGEZE DEZAPHI, Joelle, ALVARO ESTRAMINA, José Luis y TORREGROSA PERÍS, José Ramón (coords.), *Juventud, trabajo y...*, *op.cit.*.

³⁵² Véase la *nota 11*.

Dentro de esta visión global macroeconómica, nos detendremos en tres cuestiones claves, de cara a interpretar las dimensiones históricas de la metamorfosis del mercado de trabajo en España durante la época socialista. Primero, el nivel de cobertura del desempleo; segundo, la jornada laboral; y tercero, los accidentes en el trabajo.

El sistema de protección por desempleo en España durante la época socialista conocerá una profunda transformación tanto en sus dimensiones, sus funciones como en lo relativo a sus costes³⁵³. Pata central de los estados del bienestar occidentales, y elemento determinante de la cuestión social, se convertirá en el mecanismo central y más costoso en términos económicos, de cara a frenar los costes de la crisis económica de los setenta así como las tensiones sociales y obreras, tras la implantación de la estrategia de la modernización durante los ochenta. Especialmente determinante sería en esta línea la aprobación de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, *de protección por desempleo, por la que se modifica el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre*, vigente hasta el citado Real Decreto-Ley 1/1992, de 3 de abril, *de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo*, que provocaría la convocatoria de la huelga general del 28 de mayo de 1992, tal y como se ha explicado anteriormente³⁵⁴.

Aunque tanto en el Capítulo 10 como en el Capítulo 12 –ambos incluidos dentro del IV Epígrafe³⁵⁵– se examinará el nacimiento y aprobación de la Ley 31/1984, en paralelo a la negociación de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 y del propio Acuerdo Económico y Social; queden aquí apuntadas algunas cuestiones relacionadas, de forma concreta, con la política social y presupuestaria de los gabinetes socialistas.

En primer lugar, la *Exposición de Motivos* de la Ley 31/1984 es sumamente descriptiva de la situación por la que se estaba atravesando a mediados de los años ochenta en relación a la crisis económica pero también en relación a la amplia destrucción de empleo:

«La sociedad española ha venido experimentado durante los últimos años un deterioro progresivo del empleo y un crecimiento acelerado del número de personas que sufren situación de desempleo. La duración de la crisis y los procesos de renovación económica a que ésta obliga se reflejan también en una prolongación del período de tiempo que los trabajadores desplazados tardan en encontrar un nuevo puesto de trabajo.

[...].

Las sociedades occidentales, que experimentan también estos problemas, han presenciado durante estos años de dificultad económicas la progresiva descomposición de sus sistemas de protección al desempleo. Estos sistemas se habían concebido como mecanismos coyunturales de protección a un desempleo también coyuntural, el denominado paro fraccional. La aparición explosiva del fenómeno del desempleo ha minado los mecanismos de financiación de estos sistemas de protección al desempleo, al conjugarse el crecimiento acelerado de las necesidades financieras con la aparición de graves dificultades para allegar los recursos

³⁵³ Junto con lo apuntado en el Capítulo 2, *nota 243* o en este mismo Capítulo, véase aquí también a nivel jurídico, MORENEO PÉREZ, José Luis, *El sistema de protección por desempleo en España*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997

³⁵⁴ Ley 31/1984, de 2 de agosto, *de protección por desempleo, por la que se modifica el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre*. Desarrollado posteriormente a través del reglamento, Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, *por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo* [B.O.E. 7 de mayo de 1986]. También véase el Real Decreto 2394/1986, de 14 de noviembre, *por el que se extiende transitoriamente el subsidio por desempleo a determinados colectivos de desempleados de larga duración*. Visiones institucionales sobre la marcha de estas normativas, con datos a tener presente de cara a su valoración global en, GARCÍA DE BLAS, Antonio, “El sistema de protección al desempleo”, *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 325-327; y un tiempo más adelante por, ELORDI DENTICI, Alberto, “El sistema de protección por desempleo y perspectivas”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 12, (1994), pp. 121-140.

³⁵⁵ En concreto, Capítulo “10. Historia e intrahistoria de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 (marzo/mayo 1983-febrero 1984)” y en el Capítulo “12. La «necesidad hecha virtud»: el difícil parto del Acuerdo Económico y Social (febrero-diciembre 1984)”.

necesarios, como consecuencia también del escaso crecimiento económico y de los desequilibrios financieros que acompañan a la crisis.

Para romper este círculo vicioso del desempleo ha habido que recurrir durante la fase de crisis a readaptaciones en el sistema de protección, tanto en lo relativo a los ingresos como en la vertiente de los gastos»³⁵⁶.

A partir de este crudo y realista análisis de la realidad socioeconómica se articularían un conjunto de medidas, primero, para *racionalizar* y *mejorar* el sistema de protección del desempleo en su conjunto, y segundo, con el fin de ampliar sus potenciales beneficiarios. Todo ello, sin movernos ni una línea de los argumentos gubernamentales. Una ampliación potencial de los perceptores que había sido recortada sobresalientemente por los últimos gobiernos de la UCD, a través de la Ley Básica de Empleo –la tasa de cobertura tan sólo entre 1981 y 1984 caería del 49% al 26%–³⁵⁷. A lo que ha de añadirse la creación unos pocos años antes de un débil como incipiente INEM –siempre cuestionado en adelante³⁵⁸– que no cumpliría ni antes ni después de la aprobación de la Ley 51/1980 sus cometidos principales.

Un *recorte* que debilitaría el por sí “pobre” y “primitivo”³⁵⁹ sistema de protección social que se había desarrollado muy limitadamente bajo la dictadura franquista, a partir de la *Ley de Protección del Desempleo* de 1961, a la que seguirán otras tantas normativas, hasta la *Ley de Perfeccionamiento de 1972*³⁶⁰.

³⁵⁶ Extraído de la *Exposición de Motivos* de 31/1984, de 2 de agosto, *de protección por desempleo, por la que se modifica el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre*.

³⁵⁷ Ley 51/1980, de 8 de octubre, *Básica de Empleo* vigente hasta el 6 de enero de 2004 cuando se aprobaría la Ley 53/2006, de 16 de diciembre, *de Empleo* [B.O.E. 30 de diciembre de 2006]. Sobre su recorrido y herencia nos remitimos al planteamiento ofrecido en su día por, AGUILERA IZQUIERDO, Raquel, “El principio de «causalidad» en la contratación temporal”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 33, (2001), pp. 99-122, dentro de un dossier monográfico dedicado a *Derecho del Trabajo*.

³⁵⁸ Real Decreto-Ley 16/1978, de 16 de noviembre, *sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo* [B.O.E. 9 de junio de 1978] A lo largo de la época socialista numerosas serían las modificaciones de sus funciones, estructuras y competencias. A destacar entre una múltiple legislación confusa cuando no contradictoria: Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio, *por el que se determina la estructura orgánica del Instituto Nacional de Empleo* [16 de julio de 1986], que en sus líneas básicas estará vigente hasta el 2003 cuando se aprobaría la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, *de Empleo*. En relación a su funcionamiento y críticas, nos remitimos a lo ya indicado en el Capítulo 2, *nota* 697 y *nota* 698.

³⁵⁹ Términos empleados por, ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de...*, *op.cit.*, 128. Consultense los datos ofrecidos al inicio de la década de los ochenta por, CUADRADO ROURA, Juan Ramón y VILLENA PEÑA, José E., *Política de rentas. Objetivos e instrumentación. Experiencia internacional. El caso español*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980. Y unos años después véase el detallado estudio de, CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CC.OO., “El sistema de protección al desempleo. Notas generales sobre la situación en 2001”, *Cuadernos de Información Sindical*, nº 23, (2001), elaborado por el Gabinete Técnico Confederal de CC.OO. y la Secretaria de Empleo.

³⁶⁰ Normativa básica para comprender el débil y asistencial sistema de protección franquista en: Ley 62/1961, de 22 de julio, *por la que se implanta el Seguro Nacional de Desempleo* [B.O.E. 24 de julio de 1961]; Ley 193/1963, de 28 de diciembre, *sobre Bases de la Seguridad Social* [B.O.E. 30 de diciembre de 1963]; Decreto 907/1966, de 21 de abril, *aprobado el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social* [B.O.E. 22 de abril de 1966]; y, Ley 24/1972, de 21 de junio, *de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del régimen general de la Seguridad Social* [B.O.E. 22 de junio de 1972]. Para una visión global de las deficiencias más sobresalientes del sistema de Seguridad Social implantado durante el franquismo remitimos a, GARCÍA, Soledad, “Ciudadanía, bienestar y desigualdad social en España”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 41, (1988), pp. 63-79; y en concreto a la obra colectiva, INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS, *Evolución Social en España, 1977-1985*, Madrid, Instituto Sindical de Estudios, 1988.

Publicada en el BOE un 4 de agosto de 1984, la Ley 31/1984, la misma conllevaría varias novedades de calado: desde la clarificación y reforzamiento de los dos niveles comprendidos, el contributivo el asistencial –véase su artículo 2– a la clarificación del contenido y significado de la situación legal de desempleo –artículo 6– hasta sus aspectos más importantes como sería el incremento de duración y el pago de las prestaciones del empleo, junto con un nuevo cálculo de periodo de cotización y otras mejoras notables. Así tanto en el artículo 8 como en el artículo 9 se reducían los periodos de cotización a la par que se incrementaba en el periodo de prestación, y, al mismo tiempo, se ajustaba a la alza la cuantía de la prestación. Igualmente en el artículo 13 se ampliaba potencialmente el número de trabajadores que podían acogerse al subsidio por desempleo a nivel asistencial. Ello sin obviar un aumento de las prestaciones de asistencia sanitaria a través del artículo 16, entre otras no pocas cuestiones, que suponían adelantos sociales.

De esta forma, lo que va ocurrir a partir de 1984 es una ampliación jurídica de la cobertura por desempleo que, no obstante, seguirá viéndose limitada tanto por la política presupuestaria como por los propia vía de los hechos consumados. Todo ello hasta bien avanzados los años ochenta.

En una muy concreta etapa (1984/1986) desde el Gobierno así como desde el PSOE, e igualmente por parte de la UGT, instalados en el cumplimiento del AES no se dejaría de insistir en los beneficiosos efectos que esta normativa “protectora” tendría a corto plazo, en la ampliación de la cobertura del sistema de protección de empleo. Una normativa que, en cualquier caso más allá de sus previsiones iniciales, se verá desbordada al poco tiempo ante la “cruda” realidad del mercado de trabajo³⁶¹.

Por lo demás, la verdadera motivación de aquella Ley –que antecedió en el orden numérico del BOE a la Ley 32/1984, es decir la relativa a la citada reforma del Estatuto de los Trabajadores– era bien distinta como en parte se ha adelantado. Tomada la decisión de flexibilizar el mercado laboral desde una perspectiva liberalizadora hasta entonces no conocida, y teniendo presente sus más que previsibles efectos de destrucción de numeroso empleo fijo, se establecía como contrapartida político-económica un mayor, aunque insistimos limitado, nivel de protección por desempleo³⁶². Y así fue, tan sólo entre 1984 a 1985 la tasa de cobertura neta

³⁶¹ Por ejemplo, la CEF del PSOE en un boletín de comunicación interna destacaría a la altura de octubre de 1985 –después de casi un año de la firma del AES– lo siguiente: «Ello trae consigo un aumento de la cobertura. En 1984 la cobertura alcanzada del 26,7 por ciento de los desempleados. A finales de 1985 se alcanzará una cobertura del 43 por ciento y en 1986 un 48% por ciento, y tal y como establece el AES». AHFFLC, PSOE-CEF, “Informe del Boletín de Comunicación Interna, nº 5”, Madrid, 3 de octubre, sig. AI-139-04, p. II. (4). [sobre lo lejana que estaban estas cifras de la realidad véase el *Gráfico 29*]. Por parte de la UGT se transitaría por un camino similar o parecido al recorrido en otras cuestiones de calado. De una inicial ‘denuncia suave’ [véase, AHFFLC, UGT, “Informe de gestión presentado por el Secretario General al XXXIV Congreso”, Madrid, 2-6 de abril 1986, sig. 001635-007] en torno a los graves incumplimientos del AES en su vertiente social-económica –al igual que había ocurrido con los *Pactos de la Moncloa*– se pasaría con el paso de los años a una frontal crítica. De hecho, finiquitada la concertación social se atacaría duramente los objetivos contenidos en el AES por parte de la UGT. Especialmente activo sería uno de los grandes estrategas ugetistas, José María Zufiaur, quien señalaría en un manuscrito, entre otras cuestiones, lo siguiente: «Para el Presidente González la negociación y la concertación se arruinan si los sindicatos defienden sus propias posiciones, y pretende continuamente que la concertación consista en negociar las reivindicaciones más retrógradas de la C.E.O.E.». Indicando a continuación: «El grado de cumplimiento del único acuerdo tripartito firmado por el Presidente González, el AES, es un claro exponente de cómo entiende la concertación el Gobierno Socialista [...] Así, el flagrante e incumplimiento del compromiso de cobertura por desempleo (Art. 10), que debió ser del 43% a finales de 1.985 y del 48% a finales de 1.986, siendo así que actualmente no llega al 30%». AHFFLC, Fondo Zufiaur, José María Zufiaur, “La concertación del presidente González”, Madrid, 15 de febrero de 1989, sig. 001633-003. Nos remitimos aquí, en concreto, a lo expuesto en el apartado “12.3. La larga *resaca* del AES (octubre/diciembre 1984-1985/1986)”.

³⁶² Así en parte se reconocía en la propia *Exposición de Motivos*: «Proceder a un aumento progresivo de la cobertura del desempleo para paliar las consecuencias sociales del paro, cuya

de la protección del desempleo se incrementaría prácticamente en 6 puntos porcentuales, en un año en donde se llegaría a los 2.641.998 millones de parados. Es decir, un 21,5% de tasa de paro. Con todo, durante 1985 tan sólo se encontrarían protegidos unos ochocientos mil trabajadores, mientras que más de un millón y medio de asalariados desempleados estarían sin ningún tipo de protección.

Antes de adelantar otros acontecimientos, se ha de remarcar como la Ley 31/1984, dentro del panorama jurídico español en materia de protección por desempleo, a la postre ha sido la normativa que más derechos, desde la perspectiva del asalariado, generó, y todo ello a pesar de sus claras limitaciones como acabamos de enumerar. Una normativa que desde el Gobierno siempre se consideró, de hecho, *generosa*³⁶³. Así desde los propios medios socialistas se llegaría a hablar de la generalización de una “cultura del subsidio”, excepto en momentos y en circunstancias muy concretos³⁶⁴. Hechos, en verdad, excepcionales durante la “década del cambio”.

A modo de resumen, debe también afirmarse, sin tapujos, que si una normativa de tal tipo puede y debe ser calificada de tal manera, ejemplifica por sí sola las dificultades por las que ha atravesado el sistema de protección social por desempleo en nuestro país durante los últimos cuarenta años. Por tanto, puede y se debe constatar una vez más la persistente “política deliberada de disminución de prestaciones” durante todos estos años³⁶⁵.

desaparición no es previsible a corto plazo. Al mismo tiempo este incremento de la cobertura debe contribuir a suavizar las consecuencias sociales de una mayor movilidad en el empleo, necesaria para consumir el ajuste». Ley 31/1984, de 2 de agosto, *de protección por desempleo, por la que se modifica el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre*.

³⁶³ Años más tarde de su salida de Economía, Carlos Solchaga directamente hablaba de la necesidad de «reducir el periodo de cobertura del desempleo», entre no pocas medidas. No terminaba ahí su diatriba, pues considera, el que fuera tantos años el más importante ministro de los que sentaban en el Consejo de Ministros, que además los parados contaban con una protección familiar con lo que de cualquier de las formas el desempleado no podía quejarse de desamparo alguno por su situación: «Por lo que se refiere a quienes se encuentran parados por haber perdido su empleo anterior, si su situación de cotizaciones a la Seguridad Social por desempleo estaba regularizada –cosa que hoy es la situación más corriente– cuentan, además de con la posible solidaridad familiar, con la proveniente del seguro de desempleo que como ya ha quedado dicho es, por comparación a otras naciones bastante más ricas que España, bastante generoso en la determinación de su cuantía y en la fijación del periodo de cobertura correspondiente. Dentro de estos casos, algunas prácticas que bordean el abuso están demasiado extendidas». Y concluía con una unívoca acusación: «La rotación de empleados en actividades sujetas a fluctuaciones de muy corto plazo o concentraciones estacionales para garantizar que mientras unos tienen empleo los otros perciben la prestación económica del paro es muy frecuente en algunas regiones españolas». SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, *op.cit.*, p. 179 y 188-1989, respectivamente. Mucho más comedido se ha mostrado siempre Joaquín Almunia a la sazón Ministro de Trabajo y uno de los principales responsables en este campo, aunque tampoco haya dejado pasar la oportunidad para reivindicar la política socialista: «La cobertura de desempleo se extendió de forma considerable, con una reforma de la Ley de Protección de Desempleo que ofrecía más garantías a los desempleados». Declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, p. 160. Compléméntese lo anterior con lo ya citado en el Capítulo 6, *nota 245*.

³⁶⁴ MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-equidad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*, p. 210. Y añadía el autor: «La sociedad española se inclina claramente por la extensión y profundización del Estado del Bienestar, pero puede que sea la protección por desempleo la vertiente del mismo que mejor legitimación social tiene, bien a pesar de que el artículo 41 de la Constitución Española, que mandata a los poderes públicos a establecer un sistema que haga frente a las situaciones de necesidad de los españoles, sólo precisa que ello ha de hacerse ‘especialmente en caso de desempleo’». *Ibíd.*

³⁶⁵ GONZÁLEZ CALVET, Josep, “Prestaciones sociales, eficiencia y equidad. Análisis del gasto de protección social en España, 1982-1992” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 261.

Más allá de los debates políticos y doctrinales que se generaron a raíz de la Ley 31/1984³⁶⁶, el sistema de protección del desempleo cumplió una triple función, en esa siempre evidente intencionalidad política de instrumentalización por parte de los gobiernos socialistas con respecto al gasto social: primero, a través de la reestructuración y refinanciación del INEM, principal aunque no únicamente, se pondrían en marcha las primeras políticas activas de empleo como innovador mecanismo con el fin de mejorar las posibilidades de inserción de los colectivos de parados *especiales*. Sus logros y balances serán bastante relativos todavía más teniendo en cuenta su coste global³⁶⁷; segundo, a partir de las diversas reformas y modificaciones por las que atraviesan los mecanismos de protección en estos años, variarán sustancialmente, y no siempre en un sentido más protector, la cuantía y el tiempo de las prestaciones como también hemos avanzado; y, tercero, la extensión y ampliación del número potencial de perceptores de prestaciones se convertirá, por un lado, en un poderoso mecanismo de consenso y apaciguamiento social pero, por otro, de la “venta” en los más estrictos términos de *marketing* de las virtudes de las políticas sociales socialistas.

Tal y como *reza* la Constitución, España es “Estado Social de Derecho” como no se cansaría en repetir una y otra vez el conocido diputado de Izquierda Unida, Julio Anguita³⁶⁸. Y, pese a esto, la propia concepción de lo público, de lo social, se vería cuestionada seriamente en estos años, a través de múltiples declaraciones cuando no actuaciones directas por parte de los gobernantes. Entre las más clarificadoras:

«[A]simismo uno podría preguntarse si en la España de finales de los setenta y primeros ochenta la proliferación de la apertura de las oficinas del INEM era la consecuencia inevitable de la extensión del paro o éste se expandía por la España rural y los barrios periféricos de las grandes ciudades conforme se abría el registro del paro en las nuevas oficinas del INEM»³⁶⁹.

Todo ello con el agravante de que era un gobierno socialista y no un posible gabinete conservador, quien procedía a introducir en el debate tales “elementos” de reflexión. Primero ante la generalización de las sospechas del supuesto fraude de los desempleados que compaginaban una prestación, contributiva o no, pero que en todo caso era un derecho social adquirido cuando no conquistado. Sospechas, por cierto, rara vez fundamentadas en datos –al igual que viéramos con el tema de las pensiones– aunque la extensión de la idea del asalariado que cometía un delito contra lo “público” se extendiera social y mediáticamente. Segundo, por la propia concepción que se tendió, de forma consciente e intencionada, a dar a estas propias prestaciones como una especie de ayuda casi en términos voluntariosos de “regalía”, en contraste con la siempre proclamada racionalidad económica. Y tercero, ante la

³⁶⁶ Véase lo apuntado en la *nota* 354.

³⁶⁷ Para una visión gubernamental, ESPINA, Álvaro, “Un balance de las políticas de implementación de las políticas activas en el mercado de trabajo en España: 1983-1989” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía...*, *op.cit.*, vol. III, pp. 1027-1068. Aunque en el apartado específico se volverá a insistir sobre esta cuestión, queden aquí ya apuntadas tres obras de tono crítico, no tanto con la puesta en marcha de las políticas activas sino con sus mejorables resultados. En primer término el impresionante trabajo de, CACHÓN RODRÍGUEZ, Lorenzo (dir.), *Colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo y políticas activas de empleo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004; y en segundo lugar la tesis doctoral de, ALUJAS RUIZ, Joan Antoni, *Políticas activas de mercado de trabajo en España (1985-2000)*, Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, 2002 [publicada por el Consejo Económico y Social en 2003]; y en tercer lugar el informe de, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, *Desequilibrios ocupacionales y...*, *op.cit.*. Véase la bibliografía apuntada en el Capítulo 2, *nota* 39.

³⁶⁸ «Artículo I 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Véanse aquí los comentarios al respecto de, TAJADURA TEJADA, Javier, “La noción de «sociedad democrática avanzada» en la Constitución de 1978”, *Sistema*, nº 147, (1998), pp. 27-52. E igualmente, ANGUITA, Julio, *Corazón rojo: la vida después de un infarto*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005.

³⁶⁹ SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, *op.cit.*, p. 189.

comercialización de una “supuesta” solidaridad obligada cuando trabajadores y empleados contribuían directamente a la financiación del sistema de la Seguridad Social. Afirmaciones, declaraciones e intenciones no ya socialdemócratas, nuevamente, sino de muy poco contenido *progresista* y menos *solidario*.

Nos preguntamos, ¿sería excesivo decir que durante estos años desde el propio Gobierno socialista, se cuestionó gravemente la noción doctrinal del sistema público de Seguridad Social? No creemos que sea excesivo así calificarlo. Todavía más, cuando se ha visto la ineficacia o apatía contra el fraude fiscal, contra el trabajo en negro, o simplemente ante la impunidad empresarial en lo relativo a estos mismos campos.

Pero no sólo, pues el incremento de las prestaciones por desempleo constituye el *efecto no querido o no deseado* de la propia estrategia de modernización en el campo laboral. Tras la aprobación de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 y la generación de la denominada “cultura empresarial de la temporalidad”, que conllevará a que más de un tercio de los asalariados se inserten y salgan del mercado del trabajo a través de contratos temporales, se generará irremediablemente un incremento considerable de las partidas presupuestarias en tal materia. Un hecho previsto a corto plazo inclusive en los más *optimistas* escenarios previstos por el Gobierno.

El tradicional dilema de las políticas socialdemócratas entre *equidad* y *eficiencia* en materia de protección de desempleo, resultaría así dispar en nuestro caso. La propia realidad económica del país con el lastre del desempleo estructural siempre superior a los dos millones de desempleados –recuérdese que estás cifras llegarían a cerca de tres millones de personas en 1987– terminaría por generar una salida no equitativa ni eficiente. Y siempre marcada por su alto coste económico en términos globales. A partir de las decisiones adoptadas y mantenidas en el tiempo en materia de inflación y de control del gasto público, los socialistas verían aquí cortocircuitados sus por sí limitados márgenes de actuación. A lo que se sumaría una estrategia en este ámbito más coyuntural que a medio y largo plazo. Un carácter coyuntural –si se quiere cortoplacista– dependiente, en gran medida, de las respuestas políticas a los diversos conflictos sociales en este tiempo.

¿Cómo se traduciría todo lo anterior? Pues en términos históricos, y dejando aparte la hipótesis de la extensión de la *sospecha* sobre el *fraude* de los trabajadores parados, en una necesaria, obligada e improrrogable extensión del número de perceptores de prestaciones, que pasarán de 776.823 a 1.630.990 entre 1982 a 1992. Prácticamente el doble. Un estiramiento de la extensión numérica que debe vincularse otra vez al pago de la “deuda social” tras el 14-D, cuando entonces, y en tan sólo cuatro años (1989-1992), se incrementarían en más de medio millón los potenciales perceptores de prestaciones –consúltese la *Tabla 140*–³⁷⁰.

En la *Tabla 140* como en la *Tabla 141* se presentan a nivel macroeconómico un conjunto de cifras en relación a las características centrales del sistema de protección. Primero, las relacionadas con el subsidio asistencial³⁷¹. Triplicado el número –de 208.316 a 817.039

³⁷⁰ Junto lo ya citado en el Capítulo 7, *nota 180*, véase la normativa que se aprobaría tras el 14-D en el apartado “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

³⁷¹ Véase el trabajo colectivo a nivel jurídico de, SOUTO PRIETO, Jesús (dir.), *El desempleo: especial consideración de las prestaciones por nivel de asistencia*, Madrid, Consejo del Poder Judicial, 1996; junto con el de, GARCÍA VALVERDE, M^a Dolores [et al.], “La protección por desempleo: el subsidio asistencial” en MONEREO PÉREZ, José Luis, MOLINA NAVARRETE, Cristóbal y MORENO VIDA, M^a Nieves (coord.), *La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras: homenaje al profesor José Vida Soria con motivo de su jubilación*, Granada, Comares, 2008, pp. 1075-1094. Igualmente consúltense y compárense, primero, un esclarecedor informe en los primeros compases de la época socialista por parte del, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Sinopsis sobre Mercado de Trabajo y Política de Empleo en España: 1975-1983 (Análisis de las estadísticas y relación de medidas adoptadas)*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983; y años más tarde el también el informe ‘oficial’ en torno a las ‘ayudas’ relacionadas con un colectivo de trabajadores

perceptores en estos años— de quienes accedieron a esta prestación no contributiva, vinculada a nivel económico al SMI —en torno a un 75% del propio salario considerado para el propio SMI— refleja, por lo demás, la dramática situación por la que atravesaron cientos de miles de personas que habían agotado la prestación contributiva. Una importante *bolsa* de desempleados en términos porcentuales, generalmente vinculada a situaciones de paro de larga duración y de exclusión socio-laboral intensa.

Todo ello con una serie de características que no deben de dejar de citarse tal y como lo hizo en su momento Gregorio Rodríguez Cabrero:

«[T]ambién estamos ante una forma de diferenciación de desarrollo de los derechos sociales en un segundo nivel, para los excluidos del mercado de trabajo o población precaria; en general, se trata de sistemas que no van dirigidos tanto a luchar contra la exclusión social cuanto a garantizar un control social y una mínima demanda por parte de grupos crecientes de población [...] estamos ante sistemas en los que la carga de prueba de la necesidad o carencia de recursos [...] tiende a estigmatizar a los solicitantes de los beneficios asistenciales»³⁷².

En segundo lugar, destaca la lenta reducción de los parados sin ningún tipo de protección —*Tabla 141*—. Tan sólo será a partir de los años noventa cuando esta cifra se encuentre por debajo del millón de personas. Un dato extraordinariamente significativo de las limitaciones intrínsecas del sistema de protección en España. Sobre todo teniendo presente como entre los años 1993 a 1996, y a pesar de que nos alejamos de nuevo de nuestro marco temporal, se iban a atenuar de forma notoria los niveles de protección social.

En cualquier caso, la tasa tanto *net*a como *bruta* de protección del desempleo, se duplicarán en términos económicos reales durante los aquí diez años de mandato socialista. En el *Gráfico 29* se visualiza esta evolución con todas las características repetidas en cuanto a las etapas citadas. No obstante, esta positiva evolución, en todo caso, distaba de los niveles alcanzados por otros países europeos.

Por más que la situación difiera sobresalientemente en cada país de la UE-12 —por ejemplo, véanse los casos concretos de Francia y Bélgica³⁷³— España seguiría ocupando los últimos puestos del ranking tanto en el carácter protector a nivel jurídico, en los niveles de las tasas netas de protección como en lo relacionado con la cuantía percibida. Esto no significa que en relación al Índice de Cobertura del Gasto en Protección Social con respecto al promedio de la UE, España gastará menos en estas partidas. Como quedó apuntado en la *Tabla 130* durante

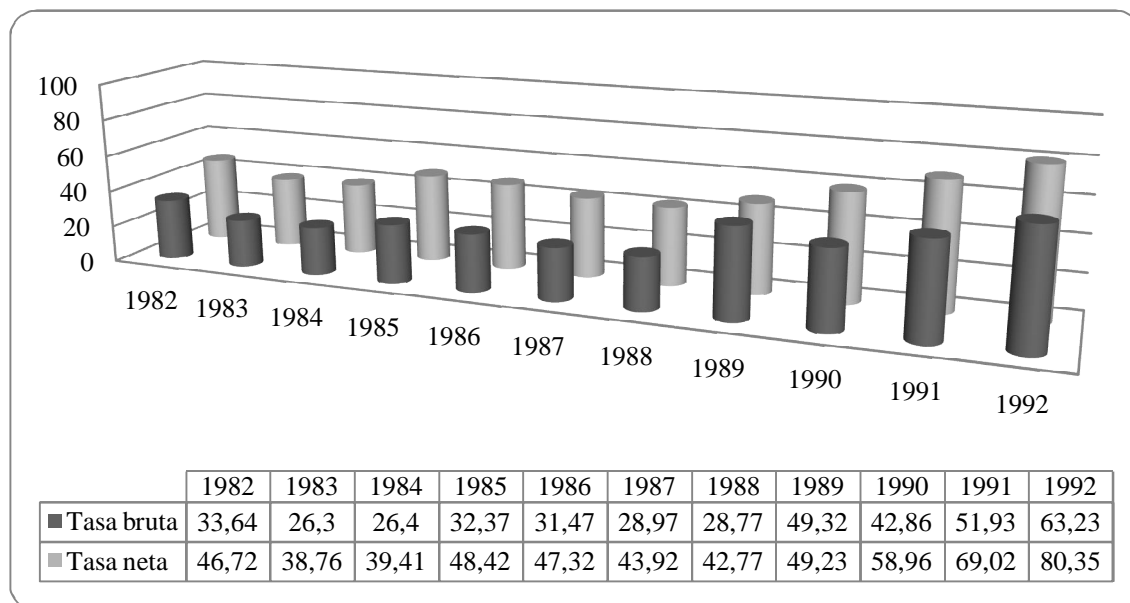
específico: INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, *Desempleados de larga duración en situación de necesidad mayores de 45 años: programa de renta activa de inserción*, Madrid, Instituto Nacional de Empleo, 2001. Y estudios de caso en: COLLADO GARCÍA, Luis y PIQUERAS PIQUERAS, M^a del Carmen, *El subsidio por desempleo: un estudio del nivel asistencial de protección*, Madrid, Trotta, 1997; y, finalmente, BURGOS GINER, M^a Ángeles, “Prestación por desempleo: el subsidio asistencial cuasi-contributivo”, *Revista de Treball, Economia y Societat*, n^o 28, (2003), pp. 27-36.

³⁷² RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, “Integración, asistencialización y exclusión en el Estado del Bienestar” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche...*, *op.cit.*, p. 278-279.

³⁷³ Entre otros trabajos, y en concreto para la primera mitad de la década de los ochenta, FINA, Lluís, “Evolución de las prestaciones en España y en la OCDE”, *Papeles de Economía Española*, n^o 26, (1986), pp. 328-332; LÓPEZ LÓPEZ, M^a Teresa, “Las prestaciones por desempleo en los países de la Unión Europea”, *Cuadernos Económicos de Deusto*, n^o 11, (1994); y para todo el periodo objeto de estudio, BARRADA, Alfonso, *La protección social en la Unión Europea, de 1981 a 1994: con especial atención a la cobertura de la inactividad laboral*, Bilbao, Fundación Banco Bilbao Vizcaya, 1997. Todo ello junto con el informe de referencia a nivel europeo de, MISSOC, *Social protection in the member states of the European Union: situation on 1 January 1998*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999.

todos estos años estas partidas tenderán a duplicar a las europeas³⁷⁴ [véanse en el “anexo” la *Tabla 140* y la *Tabla 141*].

Gráfico 29. Evolución de la tasas de cobertura (%) neta y bruta del seguro de desempleo, 1982-1992



Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.17 y elaboración propia.

El alto coste económico del pago de los gastos relacionados con las prestaciones de los desempleados –tanto contributivas como no contributivas así como asistenciales– también se detalló en su momento en la *Tabla 131* y en la *Tabla 132*. De cara a ampliar estas cuestiones se presentan la *Tabla 142*, la *Tabla 143* y la *Tabla 144*. La primera cuestión a resaltar en lo referido a los gastos por desempleo y la cobertura en términos de porcentaje, que facilita anualmente el *Boletín Estadístico del Banco de España* y el *Boletín de Estadísticas Laborales* –a través del coeficiente del gasto promedio deflactado según IPC– son los sendos incrementos de los gastos del INEM así como por protección por desempleo en relación al PIB. Ambos suben más de un punto a la conclusión de la “década del cambio”. Una cifra que con ser significativa constituye en términos relativos un incremento bastante moderado/bajo en relación al crecimiento del propio PIB. Asimismo si algo viene a aclarar la *Tabla 143*, nuevamente, es que más de la mitad del gasto del sistema de protección del desempleo, incluso en uno de los peores años económicos de nuestra reciente historia como es 1993, estaba ampliamente sufragado por las cuotas de empleadores y asalariados a la caja común de la Seguridad Social. Por otro lado, en la *Tabla 144* se acredita en relación al presupuesto del INEM como las mayores partidas nuevamente irán destinadas a las prestaciones por desempleo, quedando muy atrás las relacionadas con las políticas activas (fomento del empleo, formación ocupacional...).

De esta forma, en estos años se asiste *de facto* a la extensión del gasto social en esta materia. Un *gasto* que, a pesar de su alto nivel en miles de millones de pesetas sería insuficiente –todavía más teniendo en cuenta el contexto europeo– para llegar a cubrir a toda la población en situación de demandante de empleo. Prácticamente uno de cada dos trabajadores en paro registrados se encontrarán desprotegidos durante todos estos. Y siempre con el peligro real de

³⁷⁴ Consúltense nuevamente los datos aportados en, BOSCA, José Emilio, FERNÁNDEZ, M^a y TAGUAS, David, “El gasto en..., *op.cit.*”, junto con lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 179* y en el presente Capítulo, *nota 299*.

una ruptura de una siempre débil cohesión social³⁷⁵ [consúltense en el “anexo” la *Tabla 141*, *Tabla 142* y la *Tabla 143*].

En pleno verano –como prácticamente se convirtió en norma para los gobiernos socialistas durante su primera legislatura con todo lo que guardaba relación con el mercado laboral– se aprobaría, primero, la Ley 4/1983, de 29 de junio, *de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones mínimas en treinta días*, y segundo, el Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, *sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos*. Dos días después ambas normativas entraban en vigor³⁷⁶. Eso sí, no tardaría en llegar una precisa Instrucción ministerial que retrasaría hasta 1984 su *entrada efectiva*, tras las correspondientes llamadas de la CEOE al señor Ministro de Trabajo en su debido momento. De cualquier de las formas, se estaba ante todo un paso en términos de derecho laboral, toda una batalla histórica del movimiento obrero, que veía la luz en el Boletín Oficial del Estado. Y que iba mucho más allá de lo que despectivamente Carlos Solchaga calificaría de “alguna cosa de imagen”³⁷⁷.

Así pues, valga por el momento indicar lo siguiente. Incluida, de forma genérica, tal propuesta en el programa electoral *Por el Cambio*, el Gobierno con el Ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, al frente se verían presionados desde la toma de posesión por parte de la UGT –dentro de su papel de *lobby* sindical en las cercanías y proximidades del Ejecutivo, para lo cual contaría con cerca de cincuenta cargos electos entre diputados y senadores³⁷⁸– de cara a avanzar

³⁷⁵ Al respecto véanse los argumentos esgrimidos por, FERNÁNDEZ BLANCO, Matilde, “Las políticas sociales en la década de los ochenta. Importancia y vigencia de las políticas de bienestar social” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, op.cit..

³⁷⁶ Ley 4/1983, de 29 de junio, *de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones mínimas en treinta días*; Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, *sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos*. Una completa visión de conjunto sobre la jornada de trabajo en España y todas sus variaciones en, TUDELA CAMBRONERO, Gregorio y VALDEOLIVAS GARCÍA, Yolanda, *Tiempo de trabajo y flexibilidad laboral*, Madrid, Fundación Alternativas, 2005; y desde una perspectiva jurídica el examen de, FITA ORTEGA, Fernando, *Limites legales a la jornada de trabajo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999. Sobre la negociación y desarrollo de estas normativas nos remitimos al apartado, “10.2.1. El momento de la toma de decisión política: la irrevocable necesidad de flexibilizar (marzo/mayo-agosto 1983)”.

³⁷⁷ Declaraciones de Carlos Solchaga en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, op.cit., p. 149. Por lo demás consúltense el recorrido de esta demanda histórica del movimiento obrero en, GONZÁLEZ GÓMEZ, Santiago, “Las reivindicaciones por una jornada legal de ocho horas de trabajo: bandera histórica del primer sindicalismo en España” en ORTEGA ESTEBAN, José (ed.), *Relaciones sociolaborales: aspectos jurídicos, económicos y sociales*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, pp. 179-193; y en, EZQUERRA ESCUDERO, Luis, *Tiempo de trabajo en España: aproximación histórica. Desde la emergencia del derecho social hasta el Estatuto de los Trabajadores de 1980*, Barcelona, Atelier, 2006.

³⁷⁸ Joaquín Almunia, una vez más, ha aportado un relato de los hechos que evidencia, teniendo presente que se trata de una aportación personal y por lo tanto subjetiva, el papel de *lobby* de la UGT en estos primeros momentos: «La primera ley relacionada con Trabajo fue la que abordaba la cuestión de las cuarenta horas semanales. Nicolás Redondo habla con Alfonso y Alfonso me llama a mí –no sé si habla con Felipe, no lo recuerdo–. Pero yo recuerdo [la] llamada de Nicolás y la llamada de Alfonso: ‘Ese compromiso se pactó con UGT en la elaboración del programa: tiene que hacerse cuanto antes’. ‘Habría que estudiarlo habrá que verlo un poco...’, le dije. ‘No, no, cuanto antes, cuanto antes’. Y tanto Nicolás como Guerra me presionan para que se haga cuanto antes. Yo les dije que sí, que se iba hacer una ley de cuarenta horas, pero era mejor pensar las cosas un poquito». En declaraciones a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., pp. 170. Una versión a grandes rasgos compartida por Nicolás Redondo pero con otros matices a tener presente: «Efectivamente hay un proceso en el cual Almunia nos llama para decir que el gobierno va a aplazar las cuarenta horas y algunos días nos llama Miguel Boyer para la misma cuestión. Yo ya me hacía a la idea de que a la semana siguiente nos llamaría Alfonso Guerra para repetírnoslo una vez más. Nuestra contestación fue la misma a Almunia y a Boyer. Dijimos

sin pausas y concesiones en este sentido³⁷⁹. O cuando menos para que no se quedará olvidada aquella propuesta como otras tantas contenidas en el programa electoral socialista del año ochenta y dos, y que nunca llegarían a desarrollarse y/o legislarse. Así en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre de 1982 se acordaría elaborar un proyecto de Ley sobre las 40 horas semanales de trabajo, que asimismo contemplaba las vacaciones anuales mínimas de 30 días.

Se enterraba, pues, la jornada laboral fijada entre las 42 o 43 horas, dependiendo sector y convenio y las tres semanas de vacaciones³⁸⁰. En todo caso, este primer paso de carácter social a tener muy presente tras todo lo que acontecería en breve en relación a la solución dada a la crisis, no escaparía a las fuertes críticas de la CEOE y la Banca³⁸¹. De hecho, y tras la citada *Instrucción ministerial*, se iría avanzando en tal perspectiva por la vía de los hechos y sobre todo a través de la negociación colectiva hasta convertirse en uno de sus puntos centrales³⁸².

Nos encontramos ante un “victoria” a calibrar, de forma correcta, pues, como se ha demostrado a lo largo de la historia contemporánea, todos y cada uno de los avances conquistados por el movimiento obrero han sido cuestionados cuando no invalidados ante sucesivas reacciones³⁸³. Por lo demás, dada por *ganada* tal reivindicación no sería hasta 1999

que nos parecía bastante irresponsable que el primer gobierno socialista después de tantos años empezara ya posponiendo un tema tan crucial sin decir siquiera cuándo podría hacer efectiva la promesa [...]. Quizá habría mucha gente que ya las trabajaba, pero a mí me parecía que era una referencia para un gobierno socialista y que había sido una promesa fundamental de su campaña. Luego hemos visto el valor que tienen esas promesas, pero a mí entonces me parecía que el gobierno no podía claudicar». Declaraciones en, BURNS, Tom, *Conversaciones sobre el...*, op.cit., p. 211. Igualmente consúltese, AHFFLC, UGT-CEC, “VII Gestión que presenta la CEC”, Madrid, 4 y 5 de diciembre de 1982, y en concreto el apartado “II. 3. Cumplimiento del programa”, sig. 002605-006.

³⁷⁹ El propio Joaquín Almunia reconocería implícitamente esta cuestión: «Era un compromiso electoral del partido que no había por qué cumplir en el primer Consejo de Ministros, puesto que dicho proyecto de ley debía enviarse a las Cortes en el primer año de gestión, pero quisimos a aclarar cuanto antes nuestra voluntad política y aprobamos el proyecto». Entrevista a Joaquín Almunia en, PSOE, *100 días de...*, op.cit., p. 152

³⁸⁰ Como nuevamente recordaría el Ministro de Trabajo: «[L]a reducción de la jornada a cuarenta horas semanales sí tiene una incidencia grande, puesto que afecta al setenta y cinco por ciento, aproximadamente, de los trabajadores sujetos a convenio colectivo». Entrevista a Joaquín Almunia en, ibídem, p. 152.

³⁸¹ Véase las mismas en, Noticia, “El Gobierno aprueba la jornada laboral de 40 horas semanales”, *El País*, 23 de diciembre de 1982.

³⁸² En primer lugar dentro del dossier monográfico de *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 15-16, (1992) dedicado a *Reordenación y reducción del tiempo de trabajo*, véanse los siguientes trabajos: GONZÁLEZ de LENA ALVAREZ, Francisco, “Reducción y reordenación de la jornada de trabajo en España” (pp. 80-87); AGÜERO MENÉNDEZ, Isabel y GIRÁLDEZ NÚÑEZ, M^a Teresa, “La jornada de trabajo en España: un análisis estructural” (pp. 88-104); así como el estudio comparativo a nivel internacional de, HARALD KÄDING, Klaus, “Negociaciones colectivas sobre la reducción y reestructuración del tiempo de trabajo en los Estados miembros de la Comunidad Europea” (pp. 154-163). Y por otra parte, MARTÍN NAVARRO, José Luis, RUESGA BENITO, Santos M. ORTIZ, Laura P. y RESA NESTARES, Carlos, “Análisis económico de la negociación colectiva”, *Temas Laborales*, nº 76, (2004), pp. 287-318, que aunque dedicado en gran parte a Andalucía también contiene elementos de análisis de valor para el resto del país. Todo ello junto con los siguientes informes del Consejo Económico y Social y del propio Ministerio de Trabajo: GARCÍA MURCIA, Joaquín (dir.), *Condiciones de empleo...*, op.cit.; GOERLICH PESET, José M^a (coord.), *El tiempo de trabajo en la negociación colectiva*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008. Desde una perspectiva jurídica, CRUZ VILLALÓN, Jesús y FERRANDS CARAMÉS, Carmen, *Negociación sobre el tiempo de trabajo*, Sevilla, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2007. Todo ello junto con lo apuntado en el presente Capítulo, nota 68.

³⁸³ Ciertamente si se repasa desde la óptica del interés sindical pocos ‘triumfos’ parciales o completos pueden sumarse en su haber durante la ‘década del cambio’. Exceptuando, no obstante, la

con la Iniciativa Legislativa Popular comandada por Izquierda Unida por las “35 horas”, cuando se volvería a retomar cierto debate (a la *ofensiva*) dentro de la izquierda social, política y sindical al respecto³⁸⁴.

Lo dicho anteriormente se produciría en una coyuntura muy concreta. Pues en un escenario de progresivo debilitamiento de las fuerzas sindicales mayoritarias, se iría recuperando por la vía de los hechos –mayoritariamente a través de la coacción simbólica y no física del capital– la utilización de las “horas extras” pagadas o no pagadas –de forma general a través de esta última vía en lo que puede denominarse sin mayores problemas como el “trabajo no remunerado”³⁸⁵– hasta convertirse dicha cuestión en otra de las señas del modelo productivo español³⁸⁶. En tiempos más cercanos, la propia jornada laboral de las 40 horas no escaparía de

trascendental aprobación de la LOLS así como las medias que seguirían al éxito del 14-D. Junto con las normativas ‘progresistas’ y ‘sociales’ ya citadas en páginas anteriores puede añadirse, a lo sumo, la aprobación de la Ley 2/1991, de 7 de enero, *sobre derechos de información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación* [véase aquí... Normativa que como demostraría la práctica cotidiana en los centros de trabajo resultó muy difícil de cumplir en sus aspectos centrales. En torno al proceso de reversibilidad de la conquistas del movimiento obrero, véanse, en primer término, lo que indicamos en su momento en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora...*, op.cit.; y más específicamente, RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El gobierno imposible...*, op.cit., y en concretamente el capítulo “3. Las nuevas fronteras del trabajo”, y dentro de ahí el epígrafe, “«Hemos vencido’. Nuestras conquistas son irreversibles» (pp. 55-59). Visiones internacionales sobre un proceso de carácter global en los países industriales occidentales en, WALLERSTEIN, Immanuel, “Response: Declining States, Declining Rights?” *International Labor and Working Class History*, nº 47, (1995), pp. 24-27; junto con la obra ya varias veces citada de, SILVER, Beverly J., *Fuerzas de trabajo...*, op.cit., quien en su “Introducción” (pp. 15-27) retrata el lento declinar del movimiento obrero a nivel internacional a través de diferentes hipótesis –lo que denomina *las fuentes del poder obrero*– y de datos estadísticos –la actividad huelguística y otros indicadores similares–. Para afirmar en sus conclusiones: «En resumen, aunque resulte mucho menos negativa de lo que se suele pensar, la tendencia registrada durante el siglo XX al incremento del poder de negociación en el lugar de trabajo se está viendo al menos parcialmente invertida en el siglo XXI. El poder de negociación de muchos de los actuales trabajadores empleados, con bajos salarios, en los servicios personales y en los prestados a los productores se halla más próximo al disfrutado por los obreros textiles de mediados del siglo XIX que al detentado por los trabajadores del automóvil en el XX». Ibídem, p. 193. Véase también lo apuntado en Capítulo 7, *nota 716*.

³⁸⁴ Consúltase, IZQUIERDA UNIDA, “Manifiesto. Campaña por las 35 horas por ley y la protección social plena”, *Utopía: Nuestra Bandera*, nº 178, (1998), pp. 119-122. Sobre sus ‘éxitos’ y ‘fracasos’ remitimos a, OTERO CARVAJAL, Luis Enrique, “Izquierda Unida: un dilema imposible” en BUENO LLUCH y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coords.), *Estrategias de alianza...*, op.cit.. Ilustrativo al respecto serían un conjunto de obras con un claro matiz reivindicativo publicadas en aquellos años: DURÁN, Mª de los Ángeles, *La jornada interminable*, Barcelona, Icaria, 1986; y RIECHMANN, Jorge y RECIO, Albert, *Quién parte y reparte: el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo*, Barcelona, Icaria, 1997; GARCÍA CALAVÍA, Miguel Ángel y SANTOS, Antonio (eds.), *El reparto del trabajo*, Valencia, Germania, 1998.

³⁸⁵ Nos remitimos al estado de la cuestión expuesto en su día por, BENERÍA, Lourdes, “El debate inconcluso sobre el trabajo no remunerado”, *Papers*, nº 55, (1998), pp. 95-114.

³⁸⁶ A modo de ejemplo el *resurgimiento* de las horas extraordinarias hasta límites no conocidos en tiempos democráticos –y claramente en un claro ‘fraude de ley’– se convertiría en una realidad a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta. En ello mucho tendría que ver la normativa ya analizada en el Capítulo 7. Nos referimos en concreto al Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, *de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales*. Sumado a otras realidades no estrictamente jurídicas, y relacionadas con la falta de control y de inspección por parte de la Administración lo que favorecería una creciente impunidad empresarial al respecto. Por lo demás, en los noventa el abusivo incremento de las horas extraordinarias, concentrarían, por primera vez en mucho tiempo, parte del siempre renqueante *diálogo social*. Así sucedería con los procesos de negociación colectiva confederal vinculados con el devenir de las propias mesas sectoriales de empleo durante los primeros años noventa. Consúltase la documentación contenida en, AHFFLC, “Carta de Apolinar Rodríguez –Secretario de Acción Sindical de UGT– y José María Fidalgo –Secretario de Acción Institucional de CCOO– a Luis

peticiones, propuestas y demandas por parte de determinados grupos empresariales así como de no pocos gobiernos conservadores de cara a aumentar su cuantía hasta las 48 o inclusive 65 horas semanales³⁸⁷.

Más allá de lo dicho, la *conquista* de las cuarenta horas tiene un conjunto de antecedentes previos muy significativos de aquellos tiempos, y, por lo tanto, reseñables del contexto en donde se aprueba dicha legislación. Así en el terreno del reparto del tiempo los dos principales sindicatos del país, desde el inicio de la transición postfranquista, presionarían en un marco de clara destrucción del empleo por combatir el *uso indiscriminado* de las horas extraordinarias. “[L]as horas extraordinarias [...] prácticamente llegaron a desaparecer”, diría el conocido especialista, Carlos Pérez Domínguez³⁸⁸. No fue así, pero ciertamente se dictaron un conjunto de disposiciones de cara a encarecer y restringir el uso de las horas extraordinarias, que de tan común uso por parte de empleadores y asalariados habían sido durante el franquismo³⁸⁹.

Martínez Noval –Ministro de Trabajo y Seguridad Social–. Madrid, 29 de enero de 1993”, sig. 002903-002. A lo que se sumaría un conjunto de hechos que le llevarían a afirmar a la propia UGT en 1992 lo siguiente: «Hemos puesto de manifiesto ya el cuestionamiento que se ha hecho de las conquistas sociales, y, efectivamente, como consecuencia tanto de posiciones ideológicas como del callejón sin salida a que conduce la propia política económica». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de gestión que presente la C.E.C. al V Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 17 y 18 de diciembre de 1992, sig. C/46/14-18, p. 23. Bibliografía de apoyo al respecto y en donde también se incorpora el análisis de varias sentencias del propio TS al respecto de la *excesiva utilización* de las horas extraordinarias sin ningún tipo de control en: MARTÍNEZ FENOLL, José Salvador, *El tiempo de trabajo: jornada, horas extraordinarias, trabajo nocturno*, Valencia, CISS, 1996; FUENTE LAVIN, Mikel de la, *El régimen jurídico de las horas extraordinarias*, Granada, Comares, 2002; o, SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ, Juan Manuel, *Las horas extraordinarias y su cotización a la Seguridad Social*, Valladolid, Lex Nova, 2004.

³⁸⁷ Nos referimos, en concreto, a la propuesta surgida por parte de un conjunto de grupos parlamentarios europeos conservadores de ampliar la jornada laboral media de la Unión Europea –entre las 40 horas de España a las 48 horas de Gran Bretaña– a las 60 o 65 horas dependiendo el sector y convenio. Aprobado en un primer momento por los ministros de Trabajo en un Consejo Europeo del 10 de junio de 2008 –por una mayoría cualificada– finalmente sería rechazada la pretendida nueva directiva sobre el Tiempo de Trabajo por el propio Parlamento Europeo el 17 de diciembre de aquel mismo año. Un rechazo en donde mucho tendría que ver la intervención y la propuesta del eurodiputado socialista Alejandro Cercas –en lo que se conoció como el “Informe Cercas”–. Sobre la directiva a revisar nos estamos refiriendo a, Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, *relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo* [D.O.U.E. 13 de diciembre de 1993] [Una directiva base por cierto anulada a los pocos años a través: Sentencia del Tribunal, de 12 de noviembre de 1996, en el asunto C-84/94: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra el Consejo de la Unión Europea (Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo [D.O.U.E. 11 de enero de 1997]. En torno a aquellos momentos y las fuertes campañas y contestaciones surgidas en buena parte de Europa, nos remitimos a las siguientes crónicas: Noticia, “Alejandro Cercas: «Una gran victoria del Parlamento y de la Europa social»”, *El País*, 17 de diciembre de 2008; Noticia, “La Eurocámara bloquea la norma que permite ampliar la jornada laboral hasta 65 horas semanales”, *Europa Press*, 17 de diciembre de 2008; y en relación a las campañas en su contra nos remitimos a la que se desarrolló en el Estado español bajo el nombre de, “Campaña contra la Directiva de las 65 horas” [www.kaosenlared.net/noticia/campana/contradirectiva-europea-65-horas]. Un análisis más de fondo desde una perspectiva sindical en, ZUFIAUR, José M^a, “¿Quién defiende la Europa social?, *Temas para el debate*, n° 65-66, (2008), pp. 81-83.

³⁸⁸ PÉREZ DOMÍNGUEZ, Carlos A., “El sistema de relaciones laborales en España: una revisión de la historia reciente”, *Anales de estudios económicos y empresariales*, n° 9, (1994), p. 280. Véase también aquí lo apuntado en la *nota 176*.

³⁸⁹ Sin ánimo ni posibilidad de exhaustividad nos remitimos a lo apuntado en su día en tres estudios centrales sobre el mundo del trabajo durante el régimen franquista: BABIANO, José, *Emigrantes, cronómetros, y...*, *op.cit.*; MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere, *Productores disciplinados y...*, *op.cit.*; y más recientemente a, DOMÈNECH, Xavier, *Clase obrera, antifranquismo...*, *op.cit.*. Así mismo véase lo apuntado en el Capítulo 3, y de forma concreta en: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio

Normativas que no pueden deslindarse de una determinada correlación de fuerzas entre capital-trabajo. Ahora bien se trató, en suma, de uno de esos *pequeños pasos* que han quedado ensombrecidos ante la importancia de los acontecimientos históricos posteriores.

En el campo ahora de las cifras en la *Tabla 145*, la *Tabla 146* y en la *Tabla 147* se esbozan algunos de los múltiples datos disponibles. La reducción de la jornada laboral efectiva es una realidad constatada. En todos y cada uno de los sectores se reduciría paulatinamente la jornada laboral semanal, aunque no siempre al mismo ritmo ni intensidad como sucedió en el sector de la construcción o en el de transporte. Por lo demás, en cuanto al sexo esta evolución no solamente puede atribuirse de forma directa a la normativa dentro o fuera del convenio. La siempre más precaria situación de la mujer en el mercado de trabajo –tanto en términos porcentuales como en materia de derechos reales y formales– sujeta a una mayor temporalidad y precariedad principalmente a través de los contratos a tiempo parcial, está tras esos mismos datos. A lo que habría que sumar otras cuestiones no menores como la relacionada, sin extendernos más, con la maternidad³⁹⁰.

La entrada en vigor de la Ley 4/1983 permitiría al país situarse en condiciones de cierta igualdad e equilibrio con los países europeos. Se puede hablar aquí de una rápida normalización y europeización³⁹¹. En la *Tabla 148* se recoge una radiografía general de las horas semanales de trabajo de los asalariados a tiempo completo de la industria de los países europeos y también de Estados Unidos y Japón, a lo largo de treinta años durante la segunda mitad del siglo XX. Exceptuando el siempre singular caso británico en esta materia, España se sitúa, insistimos, por una vez en la media europea. Igualmente en la *Tabla 149* se esboza una visión general sobre las

introdutorio” en id. (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*. Y, por lo demás, véase lo apuntado en el apartado “3.3. Debates, lecturas, controversias en torno al nuevo movimiento obrero en la España de la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos”.

³⁹⁰ De enorme interés es el trabajo de síntesis todavía vigente de, BELTRÁN FELIP, Reyes, “Las mujeres y el trabajo a tiempo parcial en España. Elementos para su análisis”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, n° 17, (2000), pp. 137-161. Junto con otras dos obras de referencia imprescindibles: CARRASCO, Cristina, *El trabajo doméstico y la reproducción social*, Madrid, Instituto de la Mujer, 1991; y, ÁLVARO PAGE, Mariano, *Los usos del tiempo como indicadores de la discriminación entre géneros*, Madrid, Instituto de la Mujer, 1996. Todo ello junto con la parte específica al respecto del informe del, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, *El trabajo a tiempo parcial*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996; y para una comparación a nivel internacional, McRAE, Susan, *El trabajo a tiempo parcial en la Unión Europea: dimensión en función del sexo*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1996. Y desde una perspectiva jurídica, SALA FRANCO, Tomás y BALLESTER PASTOR, M^a Amparo, *Reducción y adaptación de la jornada por conciliación*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009. Y finalmente en relación a la maternidad de interés continua siendo la lectura de, MARTÍNEZ QUINTANA, M^a Violante, *Mujer, trabajo, maternidad: problemas y alternativas de las madres que trabajan*, Madrid, Instituto de la Mujer, 1992. Y sobre la normativa al respecto, GONZÁLEZ de LENA ALVAREZ, Francisco, “La normativa laboral sobre el trabajo de la mujer: Evolución en la década de los ochenta”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n° 13-14, (1991), pp. 138-143, dentro del dossier monográfico dedicado a, *Mujer y trabajo*; y más extensamente, RUBIO de MEDINA, M^a Dolores y CAÑAL RUIZ, José Manuel, *La integración de la mujer en el mercado laboral: normativa protectora*, Barcelona, Bosch, 2004.

³⁹¹ Trabajos aclaratorios al respecto en castellano, MICHON, François, “El tiempo de trabajo en los países industrializados: convergencias y divergencias”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n° 15-16, (1992), pp. 105-117, dentro del número monográfico dedicado a *Reordenación y reducción del tiempo de trabajo*; y unos años más tarde, RENOVALES MOTA, Iñigo, SÁNCHEZ y SÁNCHEZ-AMAYA, M^a Isabel y RASINES GARCÍA, Luis Alberto, “La reordenación y reducción del tiempo de trabajo en la Unión Europea”, *Estudios de Economía Aplicada*, n° 3, (1995), pp. 153-168. Igualmente téngase presente el conocido informe de la OCDE traducido y publicado por parte el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, y que puede localizar en: HART, R.A., *Reducción de la jornada de trabajo: un dilema para la negociación colectiva*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987. Una última visión global al respecto en el informe de la OIT de, LEE, Sangheon, McCANN, Jon y MESSENGER, Jon C., *El tiempo de trabajo en el mundo: tendencias en horas de trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009.

normativas sobre el tiempo de trabajo en los países de la Unión Europea, a partir de la Directiva Base 93/104/CE del Consejo, del 23 de noviembre de 1993, *relativa a determinados aspectos de la distribución del tiempo de trabajo*³⁹². Aunque en este terreno la comparación no resulta tan ventajosa, tanto en relación al tiempo del descanso mínimo diario o semanal, entre otros aspectos no menores, España seguía ostentando una situación próxima a los países socialmente más avanzados como Dinamarca, Francia o Alemania.

Todo proceso de cambio social –especialmente cuando este es acelerado e intenso como es nuestro caso– conlleva inexorablemente un alto grado de violencia no sólo política, social sino también física. A la por sí existente violencia estructural intrínseca del sistema capitalista, también se debe añadir una permanente violencia simbólica con mayor o menor visibilidad. Nos encontramos, ante un elemento determinante dentro de los mecanismos de *consenso* y *dominación* del régimen económico vigente³⁹³.

En nuestro caso de estudio, el de la modernización socialista, no se ha dejado de citar los diversos costes sociales y humanos de una forma más teórica que empírica, cuando no de una forma “vaga” e “imprecisa”. Su concreción, su plasmación histórica, positiva, material, más real, más cierta, es la que nos habla de los trabajadores fallecidos durante todos estos años en el “tajo”. *Morir* en accidentes laborales pero también siendo asesinado por las fuerzas policiales mientras se defendía el derecho al trabajo forma parte de no pocos episodios de la violencia política bajo la época socialista. En este apartado, nos centraremos en la primera cuestión.

“¿Por qué tiene más fuerza el derecho al beneficio del capital que los derechos sociales y humanos de la gente trabajadora: Salario, vivienda, integridad física, pensiones, salud?”, se preguntaba el analista marxista Agustín Morán. Y entre otras respuestas e hipótesis afirmaba:

«La violencia competitiva del ‘libre mercado’ disuelve los principios de humanismo y derecho a la vida, imponiendo condiciones laborales embrutecedoras y homicidas. En el Estado Español, cinco mil trabajador@s pierden la vida cada año como consecuencia de accidentes y de cánceres, encefalopatías tóxicas o enfermedades y lesiones vinculadas a sus condiciones laborales»³⁹⁴.

³⁹² Directiva Base 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, *relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo*; vigente en España hasta el 1 de agosto de 2004 cuando se aprobaría la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, *relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo* [D.O.U.E. 18 de noviembre de 2003]. Al respecto consúltese el desalentador informe de la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *Informe de la Comisión: Estado de la aplicación de la Directiva 93/104/CE de 23 de noviembre de 1993 relativa a determinados aspectos de la ordenación de trabajo (Directiva del tiempo de trabajo)*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000.

³⁹³ Sobre esta fundamental cuestión nos remitimos a los apuntes teóricos esbozados en la *Presentación*.

³⁹⁴ MORÁN CARRILLO, Agustín, “Precariedad y crisis del sindicalismo: ¿Qué precariedad? ¿Qué crisis? ¿De qué sindicalismo?” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la..., op.cit.*, pp. 492 y 497, respectivamente, y quien a su vez toma prestados los datos del estudio de, CALERA, Alfonso A (dir. y coord.), *Diagnóstico de la utilización de sustancias químicas en la industria española*, Madrid, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2005, p. 24. Más recientemente se conocían los datos procedentes de un informe de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, quienes calculaban en cerca de 9.000 los asalariados que fallecían cada año por enfermedades laborales. Pero no sólo, pues, lejos de los 30.000 enfermos que reconocían las estadísticas oficiales elevaban, dicha cifra a cerca de más de 80.000 casos. Noticia, “Cerca de 9.000 españoles mueren cada año por tumores de origen laboral”, *Servimedia.es*, 29 de diciembre de 2010. Véase igualmente, ZIMMERMANN VERDEJO, Marta de la ORDEN RIVERO, Mª Victoria y MAQUEDA BLASCO, Jerónimo, *Mortalidad y años potenciales de vida perdidos por accidente de trabajo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996.

Si a lo largo del actual modelo democrático (de mercado) la realidad histórica y económica de los parados ha quedado reducida a meras cifras en los grandes relatos o narraciones, otro tanto ha sucedido con los muertos en los centros de trabajo. Juan José Castillo supo definir esta situación de la mejor de las maneras posibles, cuando habló de la “construcción social de la normalidad”³⁹⁵. Así ha sido. Tradicionalmente en España han existido un conjunto de “problemas” estructurales de largo alcance, desde los muertos en accidente de tráfico, las mujeres asesinadas por sus compañeros o maridos hasta los fallecidos en sus puestos de trabajo o *in itinere*. Todos ellos con una muy escasa trascendencia social, mediática y por lo tanto política. En términos generales, se ha carecido de una *sensibilidad social* en estos campos.

Las *responsabilidades* en este terreno, qué duda cabe, son necesariamente compartidas. No se trata de emitir *juicios*, sino de interrogarnos por las causas que han normalizado socialmente esta “lacrà”, y, por otro, de preguntarnos sencillamente por los agentes definitorios de este problema. En torno al primer aspecto ha de resaltarse la responsabilidad, en primer lugar, del propio Gobierno. ¿Falta de voluntad política? Probablemente, como bien evidencia la falta de normativa y de medios en todo este tiempo. Un aspecto poco favorable para *atajar* o *enfrentar* un problema de la envergadura como el que estamos tratando.

No será hasta la promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, *de Prevención de Riesgos Laborales*³⁹⁶ cuando el país cuente desde entonces con una normativa integral real³⁹⁷. Normativa citada, en adelante, como una ley brillante en la materia junto con sus sucesivos reglamentos. Aunque, a la hora de la verdad, no se haya frenado la siniestralidad laboral de

³⁹⁵ CASTILLO, Juan José, “Accidentes de trabajo en España: la construcción social de la normalidad” en DÍAZ-SALAZAR, Rafael (ed.), *Trabajadores precarios...*, op.cit., pp. 137-146.

³⁹⁶ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, *de Prevención de Riesgos Laborales* [B.O.E. 10 de noviembre de 1995]. Normativa a la que deben sumarse las siguientes: Real Decreto 39/1997, de 15 de enero, *por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención* [B.O.E. 31 de enero de 1997]; y posteriormente, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social* [B.O.E. 8 de agosto de 2000]. En una segunda fase de mayor definición han de destacarse necesariamente: Ley 54/2003, de 12 de diciembre, *de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales* [B.O.E. 13 de diciembre de 2003] junto con el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, *por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales* [B.O.E. 31 de enero de 2004]

³⁹⁷ Entre una amplia bibliografía nos remitiremos, primero, a las obras de mediados de los noventa; y segundo a algunas de las más recientes que incorporan su vez las sucesivas modificaciones en torno a la cada vez más prolífica normativa específica [entre otras, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, *de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio* –en concreto, el capítulo IV, artículo 8– [B.O.E. 23 de diciembre de 2009]; y el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, *por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción* [B.O.E. 23 de marzo de 2010]] junto valiosos comentarios y valoraciones sobre la jurisprudencia *ad hoc*. En primer lugar: SALA FRANCO, Tomás y ARNAU NAVARRO, Francisco, *Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996; PURCALLA BONILLA, Miguel Ángel, *Autonomía colectiva y prevención de riesgos laborales*, Madrid, IBIDEM, 1998; CABEZA PEREIRO, Jaume y LOUSA AROCHENA, José Fernando, *Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Granada, Comares, 1998. Y en segundo lugar: PÉREZ de los COBOS, Francisco (dir.) y THIBAUT ARANDA, Javier (coord.), *Ley de Prevención de Riesgos Laborales: comentada y con jurisprudencia*, Madrid, La Ley, 2008; MATEOS BEATO, Alfredo y MARTÍN JIMÉNEZ, Rodrigo, *Conceptos y temas prácticos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Navarra, Aranzadi Thomson Reuters, 2010; SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente (dir.) y CARDENAL CARRO, Miguel y ALZAGA RUIZ, Icíar (coords.), *Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Navarra, Aranzadi Thomson Reuters, 2010.

forma global³⁹⁸—. En cualquier caso, ha de remarcarse como la misma venía precedida por la obligada adaptación de un conjunto de Directivas Europeas que se retrotraían, por lo menos, desde el año mil novecientos ochenta y nueve³⁹⁹.

Así durante la “década del cambio” seguiría vigente la pre-constitucional Orden de 9 de marzo de 1971, *por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo*, que venía a derogar el todavía más lejano en el tiempo *Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo* por Orden del 31 de enero de 1940⁴⁰⁰. Aunque en el año ochenta y ocho se publicaría en el BOE la Ley 8/1988, de 7 de abril, *sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social*, sería en la práctica una norma menor hasta la citada del noventa y cinco⁴⁰¹. En realidad, las mayores obligaciones por parte del Estado vinieron a través de la firma

³⁹⁸ En primer término, consúltense las valoraciones, de tono mayoritariamente crítico, contenidas en, GARCÍA GÓMEZ, Montserrat (coord.), *Diez años después de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2007. Véase igualmente entre una multitud de informes, el elaborado por UGT, *Informe de siniestralidad laboral en España (Informe sobre datos a diciembre 2008)*, Madrid, UGT, 2009, donde el número de muerto por accidente de trabajo seguía siendo elevadísimo (831) así como el del los accidentes graves (7.064) y los leves (821.046). Y para una visión a nivel europeo comparado para los años inmediatamente posteriores a la aplicación de la Ley 31/1995, EUROSTAT, *Work and health in the EU. A statistical portrait. Data 1994-2002*, Luxemburgo, Eurostat / Comisión Europea, 2003. Más concretamente, FONTANEDA GOMÉZ, Ignacio y MANZANEDO del CAMPO, Miguel Ángel, *Las condiciones de trabajo en España tras la aprobación de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales y su evolución*, Burgos, Universidad de Burgos, 2005. Y para un análisis estadístico, GONZÁLEZ MUÑOZ, M^a del Rosario, *La siniestralidad en España*, Málaga, Ediped, 2008 [CD-ROM].

³⁹⁹ Por orden cronológico, citaremos algunas de las Directivas Europeas base más relevantes que se encuentran detrás de la Ley 31/1995: Directiva 89/391/CE del Consejo, de 12 de junio de 1989, *relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo* [D.O.U.E. 29 de junio de 1989. Entrada en vigor: 19/06/1989–Plazo de transposición 31/12/1992]; Directiva 91/383/CE del Consejo, de 25 de junio de 1991, *por la que se complementan las medidas tendientes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal* [D.O.U.E. 29 de julio de 1991]; Directiva 92/85/CE de 19 de octubre de 1992, *relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)* [D.O.U.E. 28 de noviembre de 1992. Entrada en vigor: 23/11/1992 – Plazo de transposición 19/10/1994]; y, Directiva 94/44/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, *relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo* [D.O.U.E. 20 de agosto de 1994. Entrada en vigor: 22/06/1996]. Por lo demás, en primer término, consúltese, COMISIÓN EUROPEA, “Capítulo III del estudio comparado sobre la legislación laboral en la CEE realizado por la Comisión Europea en 1989/1990”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n^o 15-16, (1992), pp. 245-257, dentro del dossier monográfico dedicado a *Reordenación y reducción del tiempo de trabajo*. Y asimismo el más que ilustrativo informe de, CC.OO. GABINETE DE SALUD LABORAL, *Informe a la DGV sobre el proyecto: Impacto de la transposición de las Directivas de la Unión Europea relativas a la Seguridad y Salud en España*, Madrid, 1996, coordinado por Fiona MURIE y Carlos MARTÍN.

⁴⁰⁰ Orden, de 31 de enero de 1940, *por la que se aprueba el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo*; y, Orden, de 9 de marzo de 1971 (Trabajo), *por la que se aprueba la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo* [B.O.E. 16 de marzo de 1971], respectivamente. Estas ordenanzas, junto con otras, como destacaría el ilustre sociólogo Andrés Bilbao tenían no pocas connotaciones ideológicas. BILBAO, Andrés, “El contexto histórico de las ordenanzas laborales”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n^o 21-22, (1993), pp. 62-71, dentro del dossier monográfico dedicado a *Clasificación profesional y movilidad*.

⁴⁰¹ Ley 8/1988, de 7 de abril, *sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social*, vigente hasta el 1 de enero de 2001 cuando entraría en vigor: Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social*. Resulta del todo clarificador detenerse, aunque sea tan sólo de forma sintética, en la llamativa lentitud legislativa que se operaría en este terreno, si procedemos a comparar con otros aspectos laborales. Sin retroceder más allá de la década de los ochenta, véase, así primero, Real Decreto 1568/1980, de 13 de junio, *por el que se*

y ratificación del Convenio 155 de la OIT⁴⁰². Por tanto, un repaso por estos años muestra una muy pobre actividad legislativa.

aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral [B.O.E. 30 de julio de 1980]; en segundo, Real Decreto 2347/1985, de 4 de diciembre, *por el que se desarrolla el artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores sobre infracciones laborales de los empresarios* [B.O.E. 18 de diciembre de 1987]. Una normativa esta última que sería duramente criticada por la CEOE, y, de hecho, ganaría el recurso contencioso-administrativo que interpondría ante el Tribunal Supremo (núm. 40/1986): Resolución del 20 de febrero de 1987, *de la Dirección General de Servicios por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Confederación Española de Organizaciones Empresariales* [B.O.E. 6 de marzo de 1987]. Un año después se aprobaría la citada Ley 8/1988. Y desde ese momento hasta 1995 se perfilaría con mayor rapidez el contenido y definición de la normativa de procedimiento laboral. Así al menos, cabe citar, hasta el final de la época socialista: Ley 20/1988, de 14 de julio, *por el que se modifican determinados artículos del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto 1568/1980, de 13 de junio* [B.O.E. 15 de julio de 1988]; Ley 7/1989, de 12 de abril, *de Bases de Procedimiento Laboral* [B.O.E. 13 de abril de 1989]; Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, *por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral* [B.O.E. 2 de mayo de 1990]; y, finalmente, Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral* [B.O.E. 11 de abril de 1995]. Sobre su contenido, desarrollo y concretamente aplicación remitimos a: RAMÍREZ RODRIGO, Luis Néstor, “Infracciones y sanciones en seguridad e higiene en el trabajo: consideraciones a la Ley 8/1988 sobre Infracciones y Sanciones administrativas en el Orden Social”, *Salud y Trabajo*, nº 71, (1989), pp. 22-27; SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente y CORDERO SAAVEDRA, Luciano, “Estudio crítico del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo”, *Estudios Financieros*, nº 232, (2002), pp. 3-46; MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, Lourdes, “Los sujetos responsables en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social”, *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, nº 78, (2008), pp. 93-120, dentro del dossier monográfico dedicado a, *Sanciones administrativas en el orden social*; y finalmente, SALINAS MOLINA, Fernando, “Infracciones y sanciones en el orden social: derechos y garantías materiales y procedimentales”, *Información laboral. Jurisprudencia*, nº 3, (1999), pp. 4997-5015. Y más concretamente dos manuales de referencia: ALONSO OLEA, Manuel y ALONSO GARCÍA, Rosa M^a, *Derecho procesal del trabajo*, 9ª ed., Madrid, Civitas Thomson, 1997; villa, Luis Enrique de la (dir.), *Ley de procedimiento laboral: comentada y con jurisprudencia*, Madrid, La Ley, 2006.

⁴⁰² En primer término: Instrumento de Ratificación, *del Convenio 155/1982 de la OIT sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo*, adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1981 [B.O.E. 11 de noviembre de 1985. Entrada en vigor: 11 de septiembre de 1986]. Muchos años después se aprobaría el, Instrumento de Ratificación, *del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y el salud en el trabajo*, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2006 [B.O.E. 4 de agosto de 2009. Entrada en vigor: 5 de mayo de 2010]. Asimismo deben tenerse presente para nuestro caso el Convenio 81 entre otros muchos: Instrumento de Ratificación, *del Convenio relativo a la inspección del trabajo en la industria y el comercio*, adoptado el día 11 de julio de 1947 por la Conferencia General de la Organización del Trabajo en su 30ª reunión [B.O.E. 4 de enero de 1961]. Sobre el contenido de los convenios mencionados: www.ilo.org/public/spanish. Sobre su desarrollo y aplicación: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, *Plan de Acción (2010-2016). Para alcanzar un amplio grado de ratificación y de aplicación efectiva de los instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo (Convenio núm. 155, su Protocolo de 2002, y Convenio núm. 187. Adoptado por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en su 307ª*, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2010. Para su desarrollo en España: USHAKOVA, Tatiana y GIL y GIL, José Luis, “Los convenios de la OIT ratificados por España en el periodo de 1985 a 1999”, *Documentación Laboral*, nº 58, (1999), pp. 73-91; y, GARCÍA de la BORBOLLA, Luis Díez, “Convenios de la OIT en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo: análisis de contenido. Normativa interna y comunitaria (Directivas) relacionada con los mismos”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 2, (1997), pp. 165-200. Para una visión histórica a largo plazo, MATEOS, Abdón, *La denuncia del sindicato vertical*, II vols., Madrid, Consejo Económico y Social, 1997, vol. II, 1ª parte, *La era de Solís: el nacional-catolicismo ante la Organización Internacional del Trabajo*; MARTÍNEZ QUINTERIO, Esther, *La denuncia del sindicato vertical*, II vols., Madrid, Consejo Económico y Social, 1997, vol. II, 2ª parte, *El debate internacional sobre la violación del derecho de la libertad sindical en el tardofranquismo*.

A todo lo anterior se sumaría un muy recudido Cuerpo de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social⁴⁰³. Aunque no se debe minusvalorar el efecto positivo que tendría la Ley de Reforma de la Función Pública en 1984 de cara a su modernización, y en donde además aparecería la figura de los Controladores Laborales como cuerpo de gestión⁴⁰⁴; los 709 Inspectores de Trabajo en activo para 1995 constituían un dato realmente bajo teniendo en cuenta los cientos de miles de empresas existentes en aquel momento y los más de trece millones de trabajadores en activo. Al finalizar la época de los gobiernos socialistas en 1996 tan sólo había poco más de doscientos inspectores de trabajo más que en 1975 (502 inspectores). Una cifra que crecería muy lentamente –por ejemplo para 1990 era de 603– y que tan sólo se aceleraría a mayor ritmo en la última legislatura socialista⁴⁰⁵.

Por lo demás, en el ámbito de la *negociación colectiva* los accidentes de trabajo, hasta muy avanzada la década de los noventa, ocuparían un lugar secundario⁴⁰⁶. Esto no significa que por parte de las dos grandes fuerzas sindicales del país, con el poder sindical institucional representativo así establecido según la propia LOLS de 1985, no se realizarán numerosas actuaciones, propuestas así como las denuncias oportunas⁴⁰⁷. Y ello en un escenario empresarial, que heredado del paternalismo franquista, se había desentendido tradicionalmente de los sistemas de prevención y seguridad. Sistemas que en otros países europeos llevaban legislados y aplicados desde hace décadas⁴⁰⁸.

⁴⁰³ Referencias centrales –escasas en cualquier caso– sobre el cuerpo de inspectores y subinspectores de trabajo en, VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Ignacio (coord.), *La inspección de trabajo y Seguridad Social*, Pamplona, Aranzadi, 1999; GARCÍA RUBIO, M^a Amparo, *La inspección de trabajo y Seguridad Social: doctrina y jurisprudencia*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999. Todo ello junto con el ‘manual’ al uso de, SUQUÍA ARETA, Francisco Javier y VÉLAZQUEZ FERNÁNDEZ, Manuel Pedro y LÓPEZ, Rafael Antonio (coords.), *Cómo es y cómo actúa la Inspección de Trabajo*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1991. E igualmente algunos de los varios libros conmemorativos relacionados con la celebración de la efeméride del Centenario de su creación en, DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *1906-2006, centenario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social*, Madrid, Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 2007; ESPUNY TOMAS, M^a Jesús, PAZ TORRES, Olga (coords.), *La inspección de trabajo, 1906-2006*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008. Y, por último, el estudio comparado de, ARUFE VARELA, Alberto, *Estudio comparado de la carrera administrativa de los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Europa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007.

⁴⁰⁴ Ley 30/1984, de 2 de agosto, *de medidas para la Reforma de la Función Pública* [B.O.E. 3 de agosto de 1984]. Véase igualmente las modificaciones introducidas por la Ley 7/2007, de 12 de abril, *del Estatuto Básico del Empleado Público* [B.O.E. 13 de abril de 2007]. Y en cuanto al “Cuerpo de Controladores de la Seguridad Social” léase en la *Disposición Adicional Novena* el artículo 7 de la primera normativa citada que se publicaría además el mismo día en que el BOE daba a conocer la Ley 31/1984 y la Ley 32/1984. En torno a su contenido véase el completo manual de, SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, *Derecho de la Función Pública*, Madrid, Tecnos, 2008. Compléméntese lo anterior con lo apuntado en su momento en el Capítulo 5, *nota* 28.

⁴⁰⁵ Datos extraídos de, JORDANA, Jacint y RAMIÓ, Carles, “Gobierno y administración” CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de..., op.cit.*, p. 1008, Cuadro 13.2, “Evolución del total de efectivos de algunos cuerpos de funcionarios de la Administración Central, 1934-2000”.

⁴⁰⁶ A lo largo de los diferentes capítulos que componen el Epígrafe “IV. Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo”, se expondrán numerosos ejemplos para los años que median entre 1976 a 1984.

⁴⁰⁷ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, *de Libertad Sindical*.

⁴⁰⁸ Nos remitimos, de nuevo y en primer lugar a, ARUFE VARELA, Alberto, *Estudios comparado de..., op.cit.* Y asimismo, KONKOLEWSKY, Hans-Horst, “Retos de la prevención de riesgos laborales en la Unión Europea”, *Gestión Práctica de Riesgos Laborales*, n^o 29, (2006), pp. 20-24; y PÉREZ-BUSTAMANTE, Juan Pablo y CUBO MAYO, Ángel, “Prevención de riesgos laborales: una mirada a Europa”, *Información Laboral. Legislación y convenios colectivos*, n^o 20, (2007), pp. 2-7.

Reconstruir este particular episodio de la historia contemporánea no es tarea sencilla. Su invisibilidad mediática y la falta de sensibilidad social al respecto, han tenido su prolongación en el campo bibliográfico. Los escasos estudios durante la década de los ochenta así lo certifican, pues, en gran medida, no sería hasta mediados de los noventa cuando dicha cuestión iría ocupando una mayor atención institucional y académica⁴⁰⁹. Aunque no hablamos de un vacío total, ciertamente, este capítulo “negro” de la historia del país siempre ha tendido a ocupar los últimos epígrafes como, por ejemplo, sucedía hasta no hace mucho tiempo con el tema de la violencia machista. En pocas ocasiones los impresionantes datos disponibles –principalmente a través del Índice Estandarizado de Accidentes Laborales o los Riesgos Relativos por género, edad y sector⁴¹⁰– han ido acompañados de serias y fundamentadas interpretaciones sobre las causas generales y particulares de esta dura realidad.

Si nos remitimos a los datos de accidentes de trabajo totales y mortales –véase la *Tabla 149*– para los años entre 1982 a 1992, los mismos ofrecen unas cifras que por más chocantes que puedan resultar, nunca podrán reflejar por sí mismas la violencia real y simbólica, así como el dramatismo humano y la extendida impunidad empresarial que se esconden tras de ellas⁴¹¹. Nos encontramos, sin ningún tipo de género de dudas, con las principales víctimas de la modernización de las que hablará en su momento el historiador Pere Ysàs⁴¹².

Con cerca de diez millones de accidentes de trabajo contabilizados –a partir de una metodología siempre cuestionada por los principales implicados, Inspectores de Trabajo y representantes de los trabajadores, en primera línea⁴¹³– los muertos por accidente laboral llegarían a 18.389 trabajadores. Con una media anual de 1.672 trabajadores muertos –inclusive en 1989 se llegaría a cerca de 2.000 fallecidos– en este mismo tiempo, es decir, a un promedio de 4,5 trabajadores fallecidos por día, España se situaba a la altura de 1.993 entre los países con una siniestralidad más alta. Según la Tasa de Incidencia Normalizada de accidentes por 100.000 trabajadores realizada por Eurostat para 1993, España junto con Portugal estaba en la franja de los 7.000 accidentes⁴¹⁴. Muy lejos tanto de Francia o Alemania –entre 5.000 a 7.000 accidentes–

⁴⁰⁹ De muy notable importancia sería la elaboración, redacción y publicación del conocido como *Informe Durán*. Un informe dirigido por el director del Consejo Económico y Social en aquel entonces, y elaborado a partir de un encargo personal por parte del propio Presidente del Gobierno en aquel momento: DURÁN LÓPEZ, Federico (ed.), *Informe sobre riesgos laborales y su prevención: la seguridad y la salud en el trabajo en España. Estudio para la elaboración de un informe sobre riesgos laborales y su prevención*, Madrid, Ministerio de Presidencia / Boletín Oficial del Estado, 2001. Y unos años más tarde, DURÁN LÓPEZ, Federico y GARCÍA BENAVIDES, Fernando, *Informe de salud laboral. Los riesgos laborales y su prevención*, Madrid, Zurich / Atelier, 2004.

⁴¹⁰ Aunque incompleta estadística y metodológicamente véase las base de datos “Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales” que proporciona ha venido proporcionando el Ministerio de Trabajo (www.mtin.es/estadisticas/anuario2001/html/ate/index.html). Y asimismo véanse las siguientes series estadísticas por parte de Trabajo: en primer lugar, *Estadística de accidente de trabajo y enfermedades profesionales* (1987-1990), y posteriormente bajo la denominación de, *Estadística de accidentes de trabajo* (1991-...).

⁴¹¹ De notable interés el trabajo poco inusual y con datos de notable relieve de, TERRADILLOS BASOCO, Juan M^a, *La siniestralidad laboral como delito*, Albacete, Bomarzo, 2006.

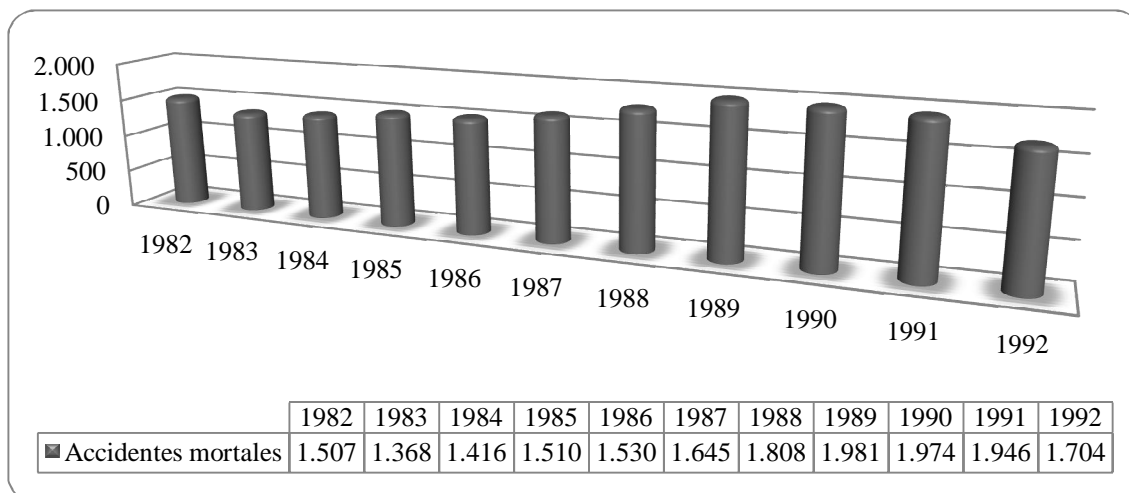
⁴¹² YSÀS, Pere, “Presentación” en id. (ed.), *La época socialista...*, op.cit..

⁴¹³ Sobre dicha cuestión remitimos el trabajo metodológico de, GARCÍA BENAVIDES, Fernando y SERRA, Carles, “Evaluación de la calidad del sistema de información sobre lesiones por accidentes de trabajo en España”, *Arch Prev Riesgos Labor*, vol. VI, nº 1, (2003), pp. 26-30. Y desde otra perspectiva complementaría: MARTÍN ROMÁN, Ángel, “Estimación de la evolución de un índice de los «verdaderos» riesgos laborales no sesgado por la composición ocupación: una aplicación para las regiones españolas”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 71, (2008), pp. 169-195.

⁴¹⁴ Consúltense los datos ofrecidos nuevamente en, EUROSTAT, *Social Protection Expenditure...*, op.cit.; y concretamente, COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y ASUNTO SOCIALES, *Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo (EEAT): metodología*, Luxemburgo,

pero todavía más lejos de Gran Bretaña o Dinamarca con menos 2.500 accidentes –véase en la *Tabla 152* el Índice de Incidencia de los accidentes por gravedad por cada mil asalariados–. Así para 1996, año de la salida de los socialistas del poder, mientras que el Índice Estandarizado de Accidentes Laborales para la UE-15 era de 3,6, España tenía una media del 5,9, es decir, cercana al doble, según el medidor metodológico más ajustado en esta materia⁴¹⁵ [consúltense en el “anexo” la *Tabla 150*, la *Tabla 151*, la *Tabla 152* y la *Tabla 153*].

Gráfico 30. Evolución de los accidentes mortales de trabajo en España, 1982-1992



Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.36 y elaboración propia.

En la *Tabla 154* quedan constatados otro conjunto de datos a tener muy presente: los accidentes de trabajo por el tipo de incapacidad producida. Y ello con una nota añadida, los accidentes tanto en jornada de trabajo como *in itinere* mantendrá unos niveles parecidos año tras año, sin significativas oscilaciones, lo que muestra el carácter estructural de este problema, instalado en el mismo centro del modelo productivo.

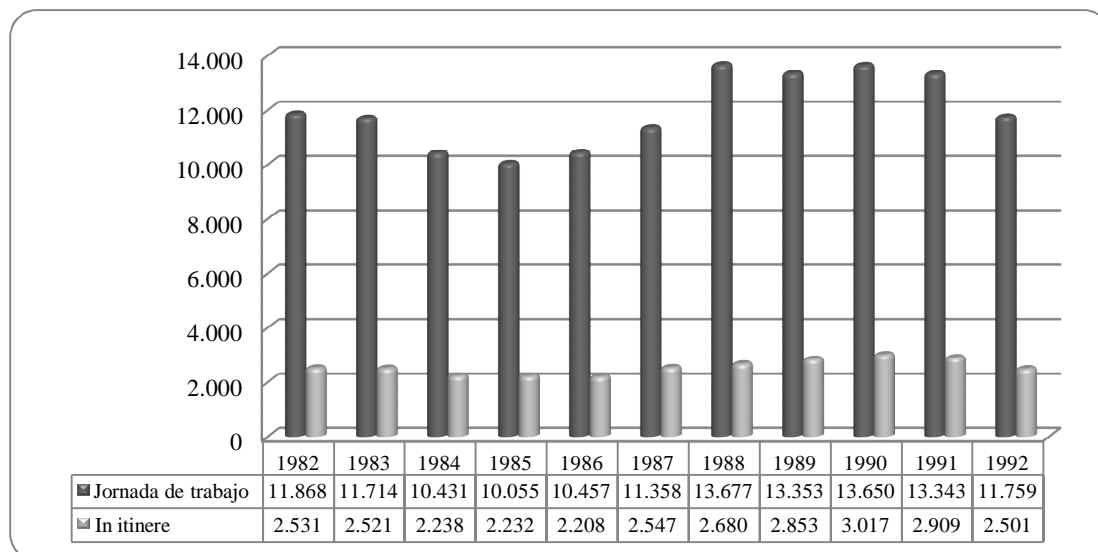
A partir de aquí, tenemos que prestar una especial atención a las cifras que reflejan los accidentes graves, pues son aquellos que suelen dejar secuelas temporales o en el peor de los casos para el resto de la vida laboral. Las “cifras oficiales” en conjunto son realmente negativas: en relación a los accidentes graves de trabajo en jornada de trabajo durante estos diez años se contabilizaron 13.364, es decir, a una media diaria de 36,6 accidentes graves; en relación a los producidos a la ida como a vuelta del trabajo, *in itinere*, se producirían en total 28.237, a una media diaria de 77,3 accidentes⁴¹⁶.

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2002. Y en concreto, la rica base de datos ofrecidas por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (European Agency for Safety and Health at Work [OSHA]) en: osha.europa.eu/es/statistics/index.stm.

⁴¹⁵ A partir de los datos de la Comisión Europea los mismos han sido extraídos de, ARANGO FERNÁNDEZ, Jesús y VALDAVIDA CASTAÑO, Emiliano, “Siniestralidad laboral y crecimiento económico en España” en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA APLICADA (ed.), *Anales de Economía Aplicada. XIV Reunión ASEPELT-España. Oviedo, 22 y 23 de junio de 2000*, [CD-ROM].

⁴¹⁶ Véanse aquí los interesantes datos ofrecidos en su día por: CASTEJÓN VILELLA, Emilio, “Accidentalidad laboral en España: algunos resultados de la explotación del nuevo parte de accidentes de trabajo”, *Salud y Trabajo*, nº 90, (1992), pp. 4-11.

Gráfico 31. Evolución de los accidentes graves en la jornada de trabajo y *in itinere*, 1982-1992



Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.39 y elaboración propia.

La mortalidad laboral por sectores productivos teniendo en cuenta el porcentaje de población ocupada en cada uno de ellos –véase de nuevo la *Tabla 58* así como la *Tabla 155*– evidencia el clásico ejemplo del alto grado de muertos en la construcción. Con tan sólo el 9,3% de la población ocupada para 1992, los 268 muertos en el relación a los 1.239 contabilizados en los demás sectores en jornada de trabajo, significaba el 21,6% del total de los fallecidos⁴¹⁷.

Unos datos que también nos obligan a preguntarnos por las *causas* y *factores* más relevantes que se encuentran detrás de la alta mortalidad laboral en España. En términos sociales mayoritarios, la respuesta tradicional sobre el asunto ha girado en torno a la siempre no fundamenta hipótesis de la *imprudencia* de los trabajadores. Una hipótesis tan frágil de sostener como débil en el terreno de las evidencias, pero que refleja, en nuestra opinión, por un lado las herencias paternalistas de la dictadura, y por otro, el consenso predominante generado por la literatura clásica/liberal/conversadora, siempre proclive a culpabilizar de su propia situación, inclusive en este terreno, a los trabajadores⁴¹⁸.

Por el contrario, la evidencia empírica viene a demostrar, sencilla y llanamente, que la alta tasa de mortalidad mucho tiene que ver, por no emplear categorías absolutas, con las condiciones de trabajo, el modelo productivo y la falta de reglamentaciones específicas. E igualmente de cómo las condiciones personales/físicas ocupan una menor relevancia estadística. Entre los diversos estudios disponibles que se han interrogado por esta cuestión han predominado dos líneas mayoritarias de interpretación no divergentes en todo caso: por un lado,

⁴¹⁷ Consúltense el concienzudo análisis que se realizó en el siguiente trabajo: GARCÍA BENAVIDES, Fernando, “Análisis de los mecanismos de producción de las lesiones leves por accidentes de trabajo en la construcción en España”, *Gaceta Sanitaria*, vol. XVII, nº 5, (2003), pp. 353-359. Más extensamente aunque desde otro punto de análisis diferente, DURÁN LÓPEZ, Federico, TUDELA CAMBRONERO, Gregorio Y VALDEOLIVAS GARCÍA, Yolanda, *Informe sobre la situación de la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción en España*, Madrid, Edisofer, 2008. Y por último no dejen de leerse las conclusiones de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social creada en el Senado a mediados de los noventa sobre este importante problema: CORTES GENERALES. SENADO, *Informe de la ponencia sobre siniestralidad laboral en el sector de la construcción en España*, Madrid, Secretaria General del Senado, Servicio de Publicaciones, 1995.

⁴¹⁸ Una cuestión perfectamente diseccionada en un valioso libro: BILBAO, Andrés, *El empleo precario...*, op.cit.; y, un par de años antes en, id., *El accidente de trabajo, entre lo negativo y lo irreformable*, Madrid, Siglo XXI, 1997.

las que han prestado una mayor atención a la “eficacia” de los sistemas de prevención⁴¹⁹; y segundo la que ha tendido a preguntarse más a fondo por las propias condiciones de trabajo⁴²⁰. Sobre el primer aspecto ya se han dejado apuntadas no pocas hipótesis de trabajo. Nos interesa, por tanto, internarnos por la segunda de las líneas de análisis. En este sentido es de destacar el estudio de Enrique Orts, junto con otros autores, titulado *Trabajo temporal y siniestralidad laboral en el periodo 1988-1995*⁴²¹. Y es de interés, porque más allá de recoger buena parte de nuestro periodo cronológico –siempre teniendo presente que tan sólo desde el cambio metodológico de la EPA en 1987 se disponen de datos concretos sobre los contratos temporales, y ello tan sólo a partir del II Trimestre– pone el acento principal en un fenómeno que devendrá en central: la flexibilización laboral y los cambios organizativos dentro de los centros de trabajo *ad hoc*, que se introducen a partir de la extensión de la temporalidad. Es decir, plantea claramente la degradación de las condiciones laborales fundamentales en relación con la cuestión de la salud de los trabajadores.

¿Qué dice este trabajo? A partir del examen de la influencia determinante que va a tener la extensión de la temporalidad tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984, presenta un conjunto de tablas –de las que un buen número se han tomado prestadas como así figura en el *anexo* estadístico– que, en conjunto, clasifican la incidencia de accidentes así como el riesgo relativo tanto por tipo de contrato y gravedad de accidente, incluyéndose en el conjunto de las variables a la cuestión de género y grupos de edad⁴²². Sus conclusiones son rotundas: primero, “[l]as tendencias de la siniestralidad laboral [...] coinciden en líneas generales con el aumento de la precariedad”; segundo, “[l]a probabilidad que tiene un trabajador temporal de sufrir un accidente de trabajo es el doble de la que tiene un trabajador fijo”; y tercero, “[l]a diferencia de riesgo entre los colectivos de trabajadores temporales y fijos se mantiene en

⁴¹⁹ Entre otras muchas revistas que han dedicado un amplísimo número de artículos sobre tales aspectos, al menos, han de destacarse: *Salud y Trabajo, Prevención: Revista técnica de seguridad y salud laborales*, *Prevención, trabajo y salud: Revista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo* (1999-2006), junto con su continuación, *Seguridad y Salud en el Trabajo* (2006-...). Por lo demás, junto con la bibliografía apuntada en notas anteriores, consúltese el manual de, IGARTURA MIRÓ, M^a Teresa, *Sistema de prevención de riesgos laborales*, Madrid, Tecnos, 2008; así como, AZCUÉNAGA LINAZA, Luis M^a, *Accidentes laborales y enfermedades profesionales: análisis, riesgos y medidas preventivas*, Madrid, Fundación Confemetal, 2009. Un detallado y documentado estudio de caso en, NAROCKI, Claudia, “La prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas españolas”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, n^o 10, (1997), pp. 157-181. Y para una comparación al nivel internacional: VALENZUELA de QUITA, Enrique, “Modelos de organización de la actividad preventiva en Europa”, *La Mutua*, n^o 11, (2004), pp. 101-115.

⁴²⁰ Referencias básicas y centrales en, MARTÍN ARTELES, Antonio y ALÓS-MONER, Ramón, “Estrategias de Flexibilidad y Condiciones de Trabajo en España”, *Documento de Trabajo. Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo*, (2000) [original en poder del autor]; E igualmente, CASTEJÓN, Emili y CRESPIÁN, Xavier, “Accidentes de trabajo: [casi] todos los porqués”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, vol. XXV, n^o 1, (2007), pp. 13-57; CASTILLO, Juan José y LÓPEZ CALLE, Pablo, “Modelos productivos, salud laboral y políticas de prevención: el caso español”, *Revista la Mutua*, n^o 21, (2009), pp. 27-48. Y finalmente una visión general muy ilustrativa de todo lo anterior a la que vez sintética, EN no pocos de los trabajos contenidos en el volumen colectivo de referencia de, PRIETO, Carlos (dir. / coord.), *Los trabajadores y...*, *op.cit.*; y desde una perspectiva complementaria: VOGEL, Laurent, “Derecho del trabajo y precarización de derechos en los Estados de la Unión Europea”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, n^o 9, (1996), pp. 243-275.

⁴²¹ ORTS BERENGUER, Enrique, LÓPEZ, M. J., BOIX, Pere y RODRIGO, Fernando, “Trabajo temporal y siniestralidad laboral en España en el período 1988-1995”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, n^o 11, (1995), pp. 275-319. Un estudio patrocinado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). Contrástese, por lo demás, con el estudio de, GARCÍA MAINAR, M^a Inmaculada y MONTUENGA GÓMEZ, Víctor Manuel, “Causas de los accidentes de trabajo en España: análisis longitudinal con datos de panel”, *Gaceta Sanitaria*, vol. XXIII, n^o 3, (2009), pp. 174-178.

⁴²² ORTS BERENGUER, Enrique, LÓPEZ, M. J., BOIX, Pere y RODRIGO, Fernando, “Trabajo temporal y..., *op.cit.* Véase el epígrafe: “2. Población estudiada y método” (pp. 281-283).

general en todos los sectores de actividad económica, para todas las formas de concurrencia de los accidentes y no parece estar determinada por las características personales (edad y género) de los trabajadores”⁴²³.

En la práctica, a partir de estas hipótesis y datos, pueden verificarse como las condiciones de trabajo durante estos años empeorarían sustancialmente, con las respectivas consecuencias en materia de siniestralidad señaladas. Hipótesis, insistimos, confirmadas por otros tantos análisis, y que no hacen más que encuadrar este grave problema social y humano dentro de los costes de la estrategia de la modernización y del régimen económico dominante⁴²⁴ [consúltese en el “anexo” la *Tabla 155*, la *Tabla 156*, la *Tabla 157* y la *Tabla 158*].

Todavía falta por indicar otro coste. No menor en ningún caso. Nos referimos al económico. Ámbito en donde rara vez las noticias al respecto han ocupado primeros titulares o los minutos iniciales de cualquier informativo. No fue así en una ocasión. En el año 2003 CCOO publicaba un informe titulado: “Aproximación a los costes de la siniestralidad en España”. Una fecha que es de interés, pues, ya habían transcurrido unos años de la puesta en marcha de la Ley 31/1995. En aquel informe se calcula que el total de los costes cuantificables de los accidentes de trabajo sumaban cerca de 12.000 millones de euros. En concreto, según los propios cálculos del informe, eran 11.988 millones de euros –entre los 6.527 millones imputables a los *costes explícitos* y los 5.461 de los *costes implícitos*– el 1,72% del PIB⁴²⁵. Tan sólo dos mil millones de euros menos que el gasto destinado a Sanidad en los Presupuestos Generales de 2002 y más de la mitad de la partida para promoción social⁴²⁶.

Retrocediendo para fechas más cercanas a nuestro estudio, un trabajo de la Fundación MAPFRE realizado por Claudia Narocki, estimaba que para 1993 sólo el gasto en atención sanitaria en este mismo aspecto, según datos oficiales, se elevaba a 10.000 millones de pesetas en relación a la siniestralidad laboral⁴²⁷. Cifra que un informe del Departamento de Salud Laboral de CCOO elevaba en 40.000 millones de pesetas más⁴²⁸. Otros tantos datos se podrían exponer –como los que se presentan en la *Tabla 159* sobre la selección de los ingresos y gastos del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para 1990-1992– pero la conclusión no varía sustancialmente: un alto coste económico que no sólo supera sobresalientemente las partidas destinadas al gasto en personal de los inspectores de trabajo, sino que se ha constituido, desde la instauración del actual régimen político democrático, en un

⁴²³ Ibídem, p. 319 [*cursiva* en el original].

⁴²⁴ Véase lo apuntado en la *nota 409*, entre otras.

⁴²⁵ Promovido por el ISTAS –vinculado a CCOO las conclusiones y el *abstract ejecutivo* del mismo pueden localizarse en, www.istas.net/portada/costes.pdf–. Un análisis algo más detallado en: GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús y NIETO SAINZ, Joaquín, “Aproximación a los costes de la siniestralidad laboral en España”, *Revista de Derecho Social*, n° 24, (2003), pp.217-224. Véase al respecto también: PEÑA LOROÑO, Mª Nieves y FERNÁNDEZ SIMANCAS, Mercedes, “Estudio de costes de accidentes”, *Prevención, Trabajo y Salud*, n° 37, (2006), pp. 12-23.

⁴²⁶ Contrástese dichos datos con lo expuestos en Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de *Presupuestos Generales para el año 2002* [B.O.E. 31 de diciembre de 2001]. En aquellos presupuestos la partida para “Sanidad” ascendió a 13.870.669,48 euros; y para “Promoción Social” era: 5.235.419,41 euros.

⁴²⁷ NAROCKI, Claudia, *Evaluación económica de la siniestralidad laboral: una aproximación a la realidad española*, Madrid, ISTAS-MAPFRE, 1995. Complementétese igualmente con la información proporcionada hace ya unos años por, ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO, *Informe de siniestralidad laboral. Propuestas para su reducción. Enero 2001*, Madrid, Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, 2001. Y por último, TEMES MONTES, José Luis, DÍAZ FERNÁNDEZ, José Luis y PARRA VÁZQUEZ, Blanca, *El coste por proceso hospitalario*, Madrid, Interamericana, 1994.

⁴²⁸ CÁRBOBA, Ángel, *Caracterización de la salud de los trabajadores en España*, Madrid, Confederación Sindical de CCOO / Departamento de Salud Laboral, 1997, citado por, NAROCKI, Claudia, *Evaluación económica de...*, *op.cit.*.

porcentaje considerable del PIB. Un *coste* que tan sólo representa la *punta del iceberg* de otros problemas económicos más agudos, por no referirnos, nuevamente, a la pérdida en vidas humanas de los trabajadores que nunca podrá ser cuantificable en términos sociales.

8.4. Un posible balance en torno a la época socialista alejado de los *lugares comunes*

«En nuestro caso lo cierto es que se ha producido la combinación de una serie de factores, de políticas y de expectativas que han roto el ‘círculo vicioso’ del estancamiento, de la inflación, del paro y de los déficits. Y que esta ruptura ha dado lugar –por superación– a un ‘círculo virtuoso’ de la recuperación con crecimiento, de la generación de empleo, de la reducción de los desequilibrios básicos del sistema y el logro de importantes mejoras sociales».

PSOE, *Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990)*
32º Congreso⁴²⁹.

A partir de nuestras hipótesis y marco de partida esbozados en las primeras páginas de este capítulo así como en otros apartados debidamente apuntados, es el momento de realizar el oportuno y necesario balance final de este capítulo, pero su vez de todo el Epígrafe “III. Los ejecutivos socialistas y la reestructuración del modelo capitalista español (1982-1992)”. Más aún cuando se ha desbrozado con centenares de datos recogidos en decenas de gráficas, cuadros y otros soportes estadísticos, las grandes realidades macroeconómicas de la “década del cambio”, así como sus principales lecturas y contra-lecturas.

En nuestro caso, tal y como sucede en otros tantos ámbitos del conocimiento histórico pero también de lo social, los espacios para el *consenso* son mínimos, y, en cambio, la *batalla* o las *batallas* por asegurar y reforzar una lectura particular predominan. Nada nuevo, en cualquier caso. El punto de arranque ya fue presentado: los escasos historiadores que se han aproximado a examinar este tiempo, apenas se han detenido en este tipo de planteos. Y cuando así ha sido, la perspectiva adoptada se ha asimilado a una especie de *única lectura posible*: una *lectura* que viene a coincidir, a grandes rasgos, con el no cuestionamiento –antes que con una interpretación fundamentada y basada en un análisis en profundidad– de las tesis socialistas oficiales. Tesis presentadas y defendidas vehementemente por Gobierno y Partido de que tan sólo existió una “única política posible”⁴³⁰.

Una *extraña* coincidencia que mucho nos habla de los grandes “consensos historiográficos” –así como de sus propias dinámicas y lógicas deductivas– realmente existentes hoy dentro de una academia, que sigue observando dicho periodo desde una prudente distancia y una acomodaticia visión. Una interpretación que, en suma, empobrece de entrada cualquier posible análisis de lo histórico. A lo que cabría añadir que este tipo de exámenes sustentados en una historia política tradicional y/o clásica, han sido incapaces de repensar o al menos plantearse si las contundentes críticas –desde los diferentes planos y actores políticos y sociales en juego– al accionar del Gobierno socialista entre 1982 a 1992, tendrían sentido y validez, más allá de la permanente *tozudez* en interpretar tales “disensos” en términos personales y sustentar, al mismo tiempo, sus hipótesis en la mera cuestión de la legitimidad electoral socialista obtenida

⁴²⁹ AHFPI, PSOE-CEF, “Memoria política y de gestión de la CEF (1988-1990) 32 Congreso, Madrid 9-11 de noviembre de 1990”, sig. Fc 912, p. 21.

⁴³⁰ Primero, véase, “2.2.11. La historiografía académica y profesional: una *agenda investigadora* prácticamente por inaugurar”, y segundo, sobre el desarrollo, sistematización pero sobre todo la extensión generalizada de lo que José María Maravall, llamaría el ‘síndrome NHA’ véase el Capítulo “6. La «revolución burguesa pendiente»: las vicisitudes de la *única política posible* y/o el síndrome NHA”.

elección tras elección⁴³¹. *Legitimidad*, que como hemos analizado en múltiples casos a lo largo de este III Epígrafe, no conllevó una *legitimidad social* automática ni menos una *autonomía* propia en materia económica.

Sumados a estos débiles *consensos historiográficos*, desde las ciencias económicas, pasando por las ciencias políticas hasta la sociología, se ha generado, a la postre, un conjunto de *consensos académicos* de mayor envergadura. Sustentados en similares argumentos y contrargumentos han sabido combinar la defensa de que tan sólo existió una *única política posible*, con la catalogación de tal tiempo histórico como de un “éxito”. Una *historia de un éxito*, en donde a pesar de que no faltan los matices y una serie de críticas, en momento alguno, cuestionarían la *dirección* de tales políticas. Reforzando, por este mismo camino, el *consenso académico liberal* convertido en un gran relato que todo lo impregna⁴³².

Antes de detenernos por las principales interpretaciones en torno a un siempre inconcluso debate acerca de la política económica socialista, quizás, convenga repasar cinco grandes evidencias ya presentadas, tanto en el terreno económico como de lo histórico. Evidencias claves para adentrarnos en las propias *lecturas* de los “éxitos” de estos años, pero también acerca de las *direcciones* y *costes* de la economía política del socialismo español. En primer lugar, resultaría que el siempre deseado fin de alcanzar los equilibrios macroeconómicos esenciales, excepto en momentos muy precisos y coyunturales, no se alcanzarían jamás. Así pues, no se conseguiría alcanzar ni completar el deseado *círculo virtuoso económico*. Antes, al contrario, pues, tanto la inflación como el déficit público no podrían ser corregidos en su perspectiva estructural. Ello con no pocas consecuencias paralelas y simultáneas como se ha detallado.

Por otro lado, la *internacionalización de la economía* se alcanzó. Pero a ¿qué precio? Dinamitada cualquier política industrial autónoma, mediante la reconversión industrial y la posterior privatización de las grandes empresas nacionales, el modelo productivo resultante no se diferenció, en lo sustancial, de las bases del desarrollismo franquista. El carácter especulativo, por más que los esfuerzos en una ortodoxa política monetaria no faltaran nunca al respecto, seguiría siendo una constante. Sobre sus debilidades e insuficiencias se ha dejado sobrada constancia. España creció económicamente pero tal crecimiento no supuso la puesta en marcha de vías apreciables de desarrollo económico y social⁴³³.

En cualquier caso, sería en el terreno, justamente, de lo social, de lo humano, en donde la economía política del socialismo mostraría sus mayores limitaciones. Dejando ahora de lado, las permanentes acusaciones desde los ámbitos socialistas –en la práctica de forma indiferente tanto desde el Partido como desde el Gobierno– contra el gasto social, los salarios –que tal y como se ha evidenciado conducirían a una *sonada* pérdida de poder adquisitivo, más allá de la doctrina oficiosa de la época– e inclusive contra los trabajadores y el movimiento sindical español; resultaría que el Ejecutivo carecería de una estrategia a medio y largo plazo para crear, bajo sólidas bases redistributivas, un estado del Bienestar. He aquí uno de los puntos centrales de *disenso* como ocurre también con el carácter técnico y fiable de los propios gobiernos socialistas. Lo que ha conducido a un virtual debate de lo *público* y de lo *social*, en el que no sólo es que se hayan querido interpretar los datos a la mejor conveniencia según el momento y el lugar –a saber, en términos relativos o absolutos, cuando no manejando cifras de dudosa

⁴³¹ Nos remitimos aquí a las conclusiones presentadas al final del “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el único camino posible de la economía política socialista?”.

⁴³² En concreto, véase, de nuevo, el Capítulo “7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de desarrollo”.

⁴³³ Un último enormemente clarificador al respecto desde una perspectiva crítica a largo plazo en, TAIBO, Carlos, *España, un gran país. Transición, milagro y quiebra*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2012.

fiabilidad– sino es que ha tendido a validar la política social de los socialistas como de *progresista*, más por el desarrollo de todo un conjunto de normativas universalizadoras de derechos socioeconómicos, antes que por sus resultados reales dentro de una dinámica global de cambio social.

Y hablando de resultados reales, palpables, junto a la precarización del mercado de trabajo y otras tantas consecuencias relacionadas con la política de flexibilización radical –desde la pérdida de derechos laborales a la dualización del mercado laboral entre *insiders* y *outsiders*– los mismos, ¿serían las consecuencias inevitables de la también una “única política posible”? Puestos a la tarea, ¿resultaría inevitable que las tasas desempleo oficiales durante toda la época socialista apenas descendiera más allá de los años vinculados al *boom* económico? Acaso, ¿la política de empleo, con una clara tendencia proempresarial, tendría algo que ver? Lo cierto es que, en rara ocasión, se ha hablado de *fracaso*. E inclusive se ha ido un paso más lejos, al tildar de insuficientes las medidas adoptadas por los diferentes Ministros de Trabajo a la hora de haber sido más contundentes en el plano *liberalizador-flexibilizador*.

Junto con las posibles interpretaciones en juego en torno a la convergencia real de la economía española con respecto a los países que conforman la Unión Europea, se nos aparece, por último, una quinta evidencia a tener presente. En no pocas ocasiones se han esgrimido no pocas críticas contra el Ejecutivo socialista en relación a toda una serie de políticas que llevaría a cabo, y cuyo ejemplo *más sonado* sería la convocatoria del referéndum de la OTAN; y a su vez, también se cuestionaría su forma de gobernar incluido aquí la instalación una cultura política –afectada por el “síndrome NHA– que no favorecería, en verdad, el asentamiento de una sociedad civil democrática así como la potenciación del tejido social asociativo. En este mismo espacio, el debate se encuentra abierto a diversos pareceres. Sin embargo, un aspecto que apenas se ha resaltado es el singular proyecto –explicito o implícito, según se quiera observar– de crear una “sociedad de propietarios” a la española⁴³⁴.

Una *sociedad de propietarios* que desborda lo estrictamente económico y lo material, y que también se ha de vincular a la generación de toda una serie de comportamientos públicos y sociales. Alentada –o cuando menos favorecida– la especulación inmobiliaria –sin olvidarnos de la bursátil– el modelo social de desarrollo pero también de convivencia, dibujó un modelo más cercano al *thatcheriano* que al que podía achacarse, en principio y de forma teórica, al socialdemócrata o al progresista. Estaríamos aquí ante otra posible consecuencia –deseada o no deseaba, es discutible, insistimos– del accionar de los gobiernos socialistas y del modelo productivo pero también social por el que apostarían, y sin cuya presencia resultaría incompleto cualquier análisis histórico.

La *definición y dirección* que seguiría la economía política del socialismo español, ha sido motivo de algún que otro debate académico. Pero, ahora bien, la fuerza y el peso del consenso económico liberal al respecto, ha dejado pocos espacios a debates reales. Así pues, en primer lugar, habría que destacar, precisamente, la posición “institucional” u “oficial” generada por los propios dirigentes y técnicos socialistas, que en este campo han sido prolíficos⁴³⁵. Estos

⁴³⁴ Relevante resulta tener presentes las tesis y los datos manejados en el trabajo de, LÓPEZ, Isidro y RODRÍGUEZ, Emmanuel, *Fin de ciclo...*, *op.cit.*, y en concreto, el apartado: “El ciclo 1985-1993. Primer ensayo de la estrategias inmobiliaria-estratégica” (pp. 157-ss.). Así como otro libro ya clásico: NAREDO, José Manuel, *La burbuja inmobiliario-financiera...*, *op.cit.*

⁴³⁵ Primero, véase, el apartado “2.2.10. El PSOE sí tiene quien le escriba: la historia oficial/militante y los «soportes intelectuales» del socialismo español”. Entre los principales representantes habría que destacar a los siguientes: MARAVALL, José M^a, “Democracia y socialdemocracia...”, *op.cit.*, pp. 41-67; id., *El control de...*, *op.cit.*; ESPINA, Álvaro, *Empleo, democracia y...*, *op.cit.*; FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del...*, *op.cit.*; o, TEZANOS, José Félix, “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en *ibídem*; y, id., “El PSOE entra en democracia” en id. (coord.), *PSOE 125...*, *op.cit.*

autores bajo el argumento de la “única política posible” han defendido las actuaciones efectuadas por los gobiernos socialistas como la “salida progresista a la crisis económica”. Una justificación sustentada en base al perfeccionamiento y adaptación de una narrativa propia, que se estructuraría de la siguiente forma: primero, la necesidad de la reformulación de su “misión histórica”, pasando por la debida explicación de los ejes de la puesta en marcha de su “revolución burguesa pendiente”, hasta su cerrada defensa de la “única política posible”. Tesis que como se ha examinado vienen a coincidir, en su mayor parte, con los “consensos historiográficos” mayoritarios.

En segundo lugar, un conjunto de autores representados, principalmente, por Carles Boix⁴³⁶, han expuesto una vía intermedia, incidiendo en el argumento de los *dilemas* a los que se enfrentaron los partidos socialdemócratas, frente a la crisis económica de los setenta. Según esta misma interpretación, los partidos políticos, en la época en que nos movemos, se habrían visto constreñidos a la hora de desarrollar una política económica autónoma. Todo ello en un contexto en el que tanto los proyectos socialdemócratas como conservadores, tendrían poco margen de acción, y cuya principal diferencia residiría en la resolución del dilema *–trade-off–* entre la equidad o la eficiencia.

Tienen en común estos dos primeros enfoques el no cuestionamiento de la tesis de “única política posible”, pero también del supuesto carácter progresista o socialdemócrata – puestos al caso–. Y, a su vez, ambos obvian con igual intensidad cualquier vinculación de los ejecutivos socialistas con las políticas liberales hegemónicas de finales de los años setenta y ochenta. Nos encontraríamos, pues, con las interpretaciones que pueden considerarse como *progresistas-liberales*.

En tercer término, habría que destacar la lectura académica liberal-conservadora hoy hegemónica. Una hegemonía que, en la práctica, se mantiene intacta desde mediados de los años ochenta. Sus principales representantes –desde Malo de Molina, pasando por Carlos Rodríguez Braun hasta el ya desaparecido Fuentes Quintana, entre otros muchos economistas– remarcarían el *carácter* netamente liberal –o si se prefiere capitalista– de las políticas socialistas. Por más que estos autores comparten la tesis de la “única política posible” así como han resaltado los no pocos *éxitos* alcanzados, para los mismos la época socialista se encontraría marcada por las insuficiencias del modelo productivo resultante. Modelo siempre maniatado por un *desmedido* gasto social, una elevación de los salarios nunca corregida definitivamente, así como por una falta de voluntad política real de avanzar de forma más acelerada y profunda, en el conjunto de reformas estructurales, de cara a lograr la definitiva liberalización e internacionalización de la economía española⁴³⁷. Uno de los puntos fuertes de tal interpretación, residiría en la muy escasa atención de lo que aquí se han denominado los costes sociales y humanos de la modernización socialista. A lo sumo, y más allá de las *culpabilizaciones* conocidas y presentadas en este trabajo, tales *costes* tendrían tan sólo una lectura económica, lejos de cualquier preocupación social o humana propiamente dicha.

Una interpretación esta última que han compartido no pocos políticos y técnicos socialistas. Y no, exactamente, una minoría sino por buena parte de quienes ostentaron altas responsabilidades de Estado. Entre otros, dos de los ministros de Economía socialistas: Miguel

⁴³⁶ BOIX, Carles, *Partidos políticos...*, *op.cit.*. Igualmente véase la amplia bibliografía apuntada en su momento al respecto en, “2.2.8. Ciencias políticas: una bibliografía central para el estudio del socialismo y de la socialdemocracia europea a nivel comparado”, y segundo, consúltese también el apartado, “6.1.4. Los márgenes de actuación de los partidos socialdemócratas. El caso del socialismo español”.

⁴³⁷ Nos remitimos, en primer lugar, al apartado “2.2.1. Ciencias económicas: un campo de batalla entre interpretaciones radicalmente diferentes entre sí”. Y en cuanto a los autores, entre otros muchos: MALO de MOLINA, José Luis, “Una visión macroeconómica...”, *op.cit.*; RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, *Estado contra mercado...*, *op.cit.*; FUENTES QUINTANA, Enrique, *El modelo de...*, *op.cit.*. A sumarse aquí también el caso de, VELARDE FUERTES, Juan, *Los años en...*, *op.cit.*.

Boyer y Carlos Solchaga⁴³⁸. Eso sí, sin los rasgos fundamentalistas de los anteriores autores citados, a la par que prestando más atención a otros tipos de resultados más “sociales”, por más que se mantenga un fuerte economicismo en sus mismas visiones. Estaríamos, pues, ante la visión extrema *liberal-progresista*, apoyada por un influyente conjunto de economistas –y en no pocos casos a su vez antiguos técnicos de la Administración en tiempos socialistas– como Guillermo de la Dehesa, José V. Sevilla, José Luis García Delgado o el propio Joaquín Estefanía⁴³⁹. Una lectura, por cierto, sobre la que también se han apoyado buena parte de los relatos *amables* de carácter historiográfico⁴⁴⁰.

Por último, y en quinto lugar, se ha de reseñar una visión crítica compuesta por una serie de autores, que procedentes de diferentes tradiciones académicas a la par políticas, han caracterizado a la política económica de los gobiernos socialistas como de liberal o directamente neoliberal⁴⁴¹. De igual forma han rechazado, en términos generales, el argumento de la “única política posible”. Visiones –como en parte se ha adelantado– que han presentado toda una pléyade de argumentos y que rara vez han merecido atención y menos *audiencia* en los círculos académicos mayoritarios. Por lo demás, para este conjunto de autores críticos, la puesta en marcha de la estrategia de la modernización, implicaría adoptar las mismas medidas en los aspectos claves de la economía que se habían implantado en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, con muy escasas diferencias tanto en relación a la dirección como a los costes económicos y sociales. Políticas que seguirían las recomendaciones de las grandes instituciones internacionales económicas como el FMI o el BM.

Más allá de las trazas principales de estos planteos esbozados, pero que, de cualquiera de las formas, ha determinado no pocos análisis históricos, pero también económicos, a la hora de aproximarse a lo que sucedió en España entre 1982 a 1992/1996; una vez que se procede a alejarnos de los diferentes *consensos* alcanzados así de las divergentes lecturas consabidas de

⁴³⁸ En concreto, BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas...*, op.cit.; y, id., “El segundo ajuste económico de la democracia española (diciembre de 1982-julio de 1985)” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas...*, op.cit., vol. VIII; y, SOLCHAGA, Carlos, *El final de la edad...*, op.cit..

⁴³⁹ DEHESA, Guillermo de la, “Balance de la...”, op.cit.; SEVILLA SEGURA, José V., *Economía política de...*, op.cit.; GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía...*, op.cit.; y, ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, op.cit..

⁴⁴⁰ FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit.. Por otro lado, véase una de las últimas aportaciones publicadas en este mismo sentido: TASCÓN FERNÁNDEZ, Julio, “La política económica: debates y objetivos” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (ed.), *Consenso y enfrentamiento...*, op.cit., pp. 65-100.

⁴⁴¹ Los principales impulsores dentro de una larga lista de economistas, politólogos, sociólogos... serían, primero, autores marxistas como, ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit.; GUERRERO, Diego, *La explotación...*, op.cit.; ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *Flexibles y precarios...*, op.cit.; PETRAS, James, “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y id. (eds.), *Mediterranean Paradoxes...*, op.cit.; ALBARRACÍN, Jesús, *La onda larga...*, op.cit.; MONTES, Pedro, id., *El desorden neoliberal...*, op.cit.; en segundo lugar, habría que hacer referencia a autores procedentes de otras tradiciones críticas del pensamiento económico socialista: AHFFLC, ESTEVE, Fernando y MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Crisis y política económica: La experiencia española bajo el Partido Socialista Obrero Español”, Madrid, abril de 1989 [estudio para el Instituto Sindical de Estudios], sig. 001587-002; TORRES LÓPEZ, Juan, *Desigualdad y crisis...*, op.cit.; BERZOSA, Carlos, “La política económica del PSOE. Condicionantes y presupuestos” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista...*, op.cit.; MARTÍN SECO, Juan Francisco, *¡La economía, estúpidos...*, op.cit.. Y, por último, véanse también, SHARE, Donald, *Dilemmas of Social...*, op.cit.; ROYO, Sebastián, *From social democracy...*, op.cit.; o, GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, op.cit..

sus éxitos y fracasos, es obligado, ahora sí, resolver la gran cuestión que, en pocas ocasiones, se ha formulado plenamente.

En su versión coloquial y popular podría ser planteada de la siguiente forma: ¿la sociedad española era en 1982 más igual o desigual en términos económicos pero también sociales? O, ¿cuáles fueron los *costes sociales y humanos* de la modernización socialista frente a los proclamados éxitos de la “década del cambio”? ¿Cómo se distribuyó la riqueza generada? Situados lejos de los habituales *lugares comunes*, otro posible interrogante, desde una perspectiva global a la par que *de clase*, podría ser esbozado con las siguientes palabras: ¿durante la *década de la consolidación de la democracia* como evolucionaron las tasas de explotación entre capital-trabajo? O más concretamente: ¿Cómo evolucionó, por tanto la tasa plusvalor como variable clave que es, de cara a interrogarse por la dirección y resultados del régimen económico capitalista en un país concreto y un tiempo determinado?

Tal y como se ha mantenido en estas páginas, el PSOE, primero, y el Gobierno socialista después, se transformarían en el sujeto político e histórico de la necesaria reestructuración del modelo capitalista español. Y este es un punto de partida no cuestionable desde los presupuestos que venimos manejando. Con los datos en la mano cuando se revisan – sin querer alargar ya este de por sí amplio examen– las grandes realidades macroeconómicas expuestas –consúltense de nuevo, por ejemplo, el *Gráfico 6*, el *Gráfico 9*, el *Gráfico 25*, el *Gráfico 27* o directamente en la *Tabla 95* o en la *Tabla 96*– junto con otras tantas pequeñas realidades estadísticas pero también sociales expuestas y explicadas en sus formulaciones básicas; obtenemos una primera constatación que denota el *sentido* como la *dirección* de la economía política del socialismo español.

Alejados también de los análisis sociológicos o económicos al uso, resultaría, ahora sí, que la siempre mencionada política de *sacrificios* pero también de *solidaridades* compartidas, habrían tenido un principal destinatario: los asalariados o si se prefiere la clase trabajadora y/o las clases populares. *Clases sociales* que no sólo sostuvieron los *éxitos* achacables a la política socialista económica en términos de pérdida de capacidad adquisitiva, de pérdida de derechos laborales cuando no sociales, de pérdida de poder de negociación, sino que, al mismo, se habría visto sometidos a un relativo empobrecimiento generalizado, a costa del capital, de los *capitalistas*.

Fuera de estos “lugares comunes”, una vez más, quien mejor ha sabido captar esta contradictoria pero real situación ha sido el economista marxista Diego Guerrero. A partir de su tesis del *proceso de proletarianización* –cuya evidencia empírica “es tan abrumadora” como *incontestable*– comenzaba remarcado como “los datos demuestran con claridad que a lo largo del desarrollo capitalista [español] el flujo de quienes se proletarianizan es mayor que el de quienes se aburguesan”. Se proponía allí realizar una demostración “fáctica” de tal tesis, a partir de donde se hacía necesario “medir la «tasa de explotación», o tasa de plusvalor, que no es sino la relación entre el trabajo no pagado y el trabajo pagado en la jornada laboral «social»”⁴⁴².

Centrado su estudio en un periodo que abarcaba más de medio siglo, en concreto entre 1954 y 2001, observaba como en todo este tiempo el incremento de la explotación había sido una “constante”, más allá de “la sucesión histórica de regímenes políticos muy distintos”. Regímenes que habrían “servido de cobertura política y social a la realidad sustancialmente incambiada, pero al mismo tiempo creciente, de la explotación”.

En términos globales, la misma habría pasado del “72,7% en 1954 al 90,8% en 2001, lo que significa un crecimiento relativo global de casi un 25%”. Pero lo realmente sorprendente, en términos históricos, es cuando se procede a profundizar en la misma evolución de dicha variable etapa por etapa, a la hora de calcular la *tasa de explotación*: “La explotación disminuye en la época franquista y crece en la época democrática”.

⁴⁴² Sobre su explicación teórica a la par que económico-matemática y las diversas circunstancias que se han de atender, véase, GUERRERO, “¿Cómo se mide en la práctica el grado de explotación?” en *La explotación...*, *op.cit.*, pp. 39-48.

«[La explotación] crece mucho más deprisa en el segundo periodo [la época democrática] de lo que descendió en el primero [franquismo]. En segundo lugar, dentro de cada una de las dos épocas se pueden distinguir evoluciones diferentes para los diferentes subperiodos políticos. En el primer franquismo la explotación no decrece apenas, o si lo hace, lo hace un ritmo muy inferior que en el segundo franquismo, supuestamente menos ‘represor’. Y, por otra parte, de los tres partidos políticos que se han sucedido en el ‘poder’ (UCD, PSOE y PP), el que ha hecho elevar más deprisa la explotación [...] ha sido el PSOE (crecimiento de la tasa de plusvalor en casi un 50% durante los años de su gobierno), seguido por la UCD (un 10%) y finalmente el PP (sólo un 6%)”.

Por lo importancia histórica central de los datos manejados en relación a la *tasa de plusvalor* entre 1954 y 2001, se exponen a los mismos:

Tabla 160. Tasa de plusvalor (1954-2001). Tasas porcentajes medias de variación anual en los diferentes subperiodos seleccionados

Periodo		Subperiodo	
1954-1960	-2,20%	1964-1975	-27,40%
1960-1975	-25,70%	1975-2001	71,90%
1975-1982	10,40%		
1982-1996	46,40%		
1996-2001	6,30%	1954-2001	24,80%

Fuente: GUERRERO, Diego, *Explotación. Capital y trabajo en España (1954-2001)*, tabla 2.

No terminaría ahí su esclarecedor análisis de cara a comprender las líneas de fuerza por donde transcurrió la economía política socialista, en todo nuestro periodo histórico de investigación. Con los datos estadísticos oficiales en mano, también demostraba otras tendencias principales, como que “el capital y los beneficios suben, mientras que la tasa de ganancia desciende” durante todo el tiempo considerado, y alterándose según los ciclos económicos descritos⁴⁴³. Tendencias que muestran como las tasas de “beneficios han crecido más que la de los salarios, pero la proletarianización ha sido muy grande y de ahí los respectivos empobrecimiento (asalariados) y enriquecimiento (no asalariados)”. Siguiendo también sus argumentos y datos ofrecidos, igualmente, se viene abajo la tesis liberal del crecimiento explosivo de los salarios, una vez que se calcula el “salario monetario deflactado por el deflactor del PIB”, lo que lleva a que mientras que “el salario real se triplicó entre 1954 y 1978, el mismo se estancó por completo entre 1978 y 2001”.

Su conclusión volvía a ser contundente, tras la correspondiente presentación de sus apoyos teóricos –vistos en la primera parte de este capítulo– y las propias cifras manejadas.

«Por consiguiente, y para concluir, es un grave error pensar [que los posibles resultados de una política económica] que se trata del color político del Gobierno o del régimen político en su conjunto [...]. [Los gobernantes] son criaturas individuales de un sistema económico global

⁴⁴³ Al respecto del empleo de tales datos advertiría: «Se trata de que las estadísticas oficiales se basan en conceptos y categorías económicas que se piensan y se elaboran desde perspectivas teóricas que no son las que aquí se propugnan». Añadiendo previamente: «[P]ero al mismo tiempo supone olvidar que el capital y sus representantes políticos y teóricos (los gobiernos y los economistas, respectivamente) no sólo tienen interés en manipular la información cuando pueden hacerlo de hecho, sino que se ven requeridos por razones objetivas a conocer la verdadera realidad de los datos para poder planificar otras actuaciones y comportamientos con verdadero fundamento de causa. La propia política económica, entre otras muchas cosas, depende de ello, y no sería posible en muchos aspectos si los datos no fueran en general fiables». *Ibidem*, p. 45. Por lo demás, nos remitimos al apartado “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

que funciona *impersonalmente* de acuerdo con unas leyes *objetivas* y determina una buena parte del comportamiento personal de sus agentes»⁴⁴⁴.

Por tanto, la *determinación económica* en la que tanto insistiera el propio Karl Marx, al igual que cuando resaltara la contradicción entre las “fuerzas productivas” y “las relaciones sociales de producción”, se nos aparecen con toda su fuerza de cara a ofrecer una interpretación plausible de lo que aconteció en la época de los gobiernos socialistas. Todavía más, pues para Marx la explotación no sólo era una proceso objetivable –tal y como ha demostrado Diego Guerrero– sino es que iba mucho más allá de examinar los diferentes niveles de ingreso entre la *clase obrera* y la *clase capitalista*, sino que la factible visualización de la misma resultaría de cómo el “*empobrecimiento* del obrero debe medirse según la potencia del mundo que, en conjunto, él mismo construye obedeciendo a la voluntad de los capitalistas”⁴⁴⁵.

Petras más próximo a nuestro tiempo, lo explicaría más sencillamente:

«En este sentido, descartamos el supuesto de muchos economistas liberales de un funcionamiento favorable del mercado se traduce necesariamente en mayores niveles de vida y en más libertad política. Para nosotros, las consecuencias socio-políticas de la modernización son temas de análisis empírico. No algo comprensible por lógica deductiva a partir de los supuestos a priori de la teoría neoliberal [...].

La supuesta ‘modernización’ de la economía española bajo los auspicios del régimen socialista de Felipe González ha tenido un efecto profundamente negativo sobre la vida socio-económica política y cultural de la clase trabajadora y, en particular, sobre la familia y los trabajadores jóvenes. La liberalización de la economía han llevado a mayores injusticias sociales y a menos actividades políticas, en realidad a una disminución de la democracia política»⁴⁴⁶.

Visto esto, el último pero a su vez más imperturbable “lugar común” a cuestionar, en relación a los *consensos* existentes en torno a la economía política socialista, sería el débil proceso de legitimación del *sistema* en su conjunto en estos años, más allá de los diferentes ciclos electorales –general, autonómico/local o europeo– que marcaría los diferentes tiempos políticos del régimen capitalista español. Ciclos electorales, que, a su vez, han sido empleados de forma generalizada para hablar de la consolidación de la democracia española, a modo de *causa-efecto* del modelo español de transición.

En esta inversión de prioridades analíticas planteadas y esbozadas, a modo de *conclusión* pero también de *introducción* de cara a nuestro estudio de caso que se presentará en el IV Epígrafe, cabría subrayar que el más “grande éxito” de los gabinetes socialista residiría en el control del conflicto social y obrero por vías tanto políticas como represoras. Todo ello a través de la reformulación y reconfiguración de los consabidos mecanismos de *consenso* pero también de *dominación*. Un *éxito* innegable, pero que a su vez nos aboca a un relato de los hechos radicalmente enfrentado al de grandes narraciones, que han pasado de *puntillas* por estos trascendentales episodios históricos. Una nueva evidencia más que, en conjunto, visualiza como los múltiples conflictos obreros, sociales, políticos, estudiantiles... a los que enfrentaron los socialistas, conllevaron un débil equilibrio entre los esfuerzos destinados a la legitimación del sistema y el propio control de la situación política-económica.

Conflictos que tuvieron al movimiento obrero por principal agente movilizador. Un *sujeto* que vería muy seriamente dañada su propia capacidad movilizadora como su protagonismo histórico en adelante, al producirse una ruptura interna en el seno de la clase

⁴⁴⁴ GUERRERO, Diego, *La explotación...*, op.cit., pp. 54, 58, 59, 60, 70, 71, 79 y 80, respectivamente. Véase aquí también los datos manejados por, CÁMARA IZQUIERDO, Sergio, *Tendencias de acumulación...*, op.cit..

⁴⁴⁵ ARICÓ, José, MURMIS, Miguel y SCARON, Pedro, “El Marx desconocido” en MARX, Karl, *Elementos fundamentales para...*, op.cit., p. XXVIII. Revítese aquí la cita inicial de Marx de la *Presentación*.

⁴⁴⁶ PETRAS, James, *El informe Petras...*, op.cit., 9 y 49, respectivamente.

obrera, que afectaría tanto a su propia cohesión como sus mecanismos de solidaridad intrínseca, y que le terminarían abocando a una derrota histórica sin precedentes. Un *éxito* que, en este caso, no ha dejado de resaltarse.

Rupturas en todos los órdenes, dentro del movimiento obrero como de la clase obrera, derivadas, primero, de sus incapacidades políticas y estratégicas como por sus propios errores, pero también originadas por las políticas liberales socialistas en el campo económico y en el campo laboral. En buena parte, esta misma historia que se repetiría en otros tantos países capitalistas –como expondría magníficamente Beverly Silver en *Fuerzas del Trabajo*⁴⁴⁷– constituye un ejemplo perfecto de por dónde transcurrió la historia del capitalismo español en el último cuarto del siglo XX.

La permanente omisión de estos dos capítulos –a saber, el incremento de las tasas de explotación y las resistencias y oposiciones a la política económica socialista– en relación a la esta manida como repetida historia de un “éxito”, termina revelando no sólo los déficit y las limitaciones de las interpretaciones en juego, siempre reduccionistas y sesgadas cuando no sectarias; sino sobre todo nos muestran la *contracara* de la modernización socialista.

Revisar, bajo esta misma óptica, estos mismos “lugares no comunes” puede ser, sin duda, un buen inicio para internarnos en el examen histórico de la economía política del socialismo español.

⁴⁴⁷ SILVER, Beverly J., *Fuerzas del trabajo...*, *op.cit.*.

**IV. Historia de una reforma laboral:
contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el
proceso de liberalización del mercado de trabajo**

9. En nombre de la «modernización»: *el mandato de la flexibilidad* (octubre 1976-febrero 1983)

«La demanda de flexibilidad surge como una exigencia del ajuste macroeconómico y como instrumento de política económica para hacer frente a las situaciones de desempleo masivo con inflación. Este es el enfoque que ha dominado en las recomendaciones de los organismos internacionales y que ha sido enfatizado en la literatura sobre la crisis económica y los *shocks* de oferta. Desde esta perspectiva, la rigidez de los precios relativos y la regulación del mercado de trabajo ha conducido a un desequilibrio masivo y permanente que no puede ser combatido sin mejorar sustancialmente el funcionamiento del mercado de trabajo».

José Luis MALO de MOLINA, *Política de empleo y reforma del mercado de trabajo*¹.

Como una letanía que no deja de repetirse en bucle, los considerados –y en no pocas ocasiones “auto-considerados”– *expertos* no han cejado en su empeño en *descifrar* los factores, casusas y demás circunstancias de las causas del alto desempleo estructural en el mercado de trabajo español². Como si se estuviera ante un “misterio” sin resolver con connotaciones casi indescifrables para los *profanos* en la materia, han ido aventurando un conjunto de tesis, hipótesis, explicaciones, que, en suma, no difieren sustancialmente.

Nos referimos, claro está, a los *expertos liberales*, quienes desde su particular óptica unilateral han centrado sus relatos en tres factores en forma de contradicciones binarias: *rigidez/flexibilidad*; *distribución salarial/moderación salarial*; y *contratos de duración indefinido/temporalidad*. Obviando, de forma explícita, otros tantos factores estructurales propios del régimen económico dominante, y leyendo las estadísticas correspondientes desde un rígido ángulo de visión. Tienen, por lo demás, otro elemento común: la omisión de la estructura y dinámica del accionar empresarial como un factor a tener presente.

Nada nuevo tampoco. Pues como se explicó, de forma previa, sería precisamente en el campo de las propuestas para la salida de la crisis económica, en donde la confrontación académica-política mejor se visualizaría entre las diferentes corrientes de pensamiento en juego³. Otro tanto sucedería –y sucede– en el campo del mundo del trabajo y más concretamente de la “transición laboral”. Eso sí, con una particularidad que no puede dejar de pasarse por alto: mientras que en la economía, en términos estrictamente macroeconómicos, presentaría con el paso del tiempo resultados más o menos positivos –dependiendo del ciclo económico– en cambio en el ámbito laboral el problema del desempleo, en momento alguno, desaparecería durante la “década del cambio”. Lo que traducido, al menos, en términos estadísticos significaría que, en un momento alguno, el desempleo oficial descendería de la barrera psicológica del 15%.

9.1. Un «contexto histórico de emergencia»

A finales de los años setenta se construiría la expresión académica un “contexto histórico de emergencia” para referirse a la dramática situación por la que atravesaba el mercado

¹ MALO de MOLINA, José Luis, “Política de empleo y reforma del mercado de trabajo” en id. (ed.), *El debate sobre...*, *op.cit.*, p. 11.

² Nos remitimos aquí a lo apuntado en su momento en el apartado “2.2.4. El mundo del trabajo y las relaciones laborales: un balance generalista”.

³ Nos remitimos al apartado “6.1. Las condiciones objetivas vs subjetivas del trance modernizador”.

de trabajo español. Un *contexto* que, en gran medida, se ha mantenido durante las siguientes décadas de nuestra contemporaneidad más reciente.

En este punto, a modo de introducción, deben de plantearse varias cuestiones diferenciadas: ¿hasta qué punto se puede “responsabilizar” a la crisis económica de los setenta del nacimiento, desarrollo y consolidación del fenómeno del desempleo estructural?; y ¿cómo y de qué forma la *salida liberal* propugnada y llevada adelante por los diferentes ejecutivos que se alternaron en el poder –tanto los de UCD como los socialistas para nuestro caso– puede llegar a explicar, en resumidas cuentas, la perpetuación ya no sólo de un alto desempleo sino de la precarización de las condiciones laborales? O dicho en otras palabras cuando lo enfocamos desde nuestra perspectiva temporal central: ¿qué responsabilidad histórica se les puede achacar a las políticas de los gobiernos socialistas en la degeneración del mercado de trabajo español y, concretamente, en la aparición de la «cultura empresarial de la precariedad»?

La importancia de lo dicho es indiscutible en términos históricos. Todavía más, pues, la centralidad de las relaciones capital-trabajo cobran, desde esta misma perspectiva, un papel fundamental en el examen tanto de la transición laboral como de su posterior institucionalización, y lo que será objeto de análisis detallado⁴: la política socio-laboral, primero, del PSOE y posteriormente del Gobierno socialista. Recorres, analizar y visualizar los rasgos constitutivos que darán paso a la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 es el fin de este epígrafe.

La primera cuestión a determinar –tal y como avanzamos unas líneas antes– es el grado de influencia que tendría el modelo de acumulación capitalista franquista y su posterior crisis –tanto cuando esta se entendió como *temporal* como estructural– en la generación de un alto desempleo en un pequeño periodo de tiempo. Antes de avanzar con datos y cifras conviene detenerse en una serie de rasgos característicos del mismo: a) en primer término, un rasgo singular del modelo de desarrollo económico del régimen franquista –más allá de su definición como “fordismo incompleto”⁵– sería el establecimiento de un definido *ciclo biográfico del trabajador* para aquellas generaciones nacidas desde el fin de la Guerra Civil hasta mediados de la década de los cincuenta; b) en segundo lugar, ha de tenerse presente la tardía, insuficiente como deficiente institucionalización de un marco protector de los derechos laborales durante aquellos años. Todo ello en un claro desfase temporal-histórico con lo que sucedía en el resto de las economías occidentales en torno a la denominada “cuestión social”. Rasgos definitorios del claro subdesarrollo social de la España de la dictadura; c) y en tercer término, no ha de subestimarse la fuerte ligazón entre el alto grado de protección jurídico-laboral de los trabajadores –que no de sus derechos laborales– y su contrapartida más evidente: la inexistencia de un marco democrático de relaciones laborales, que condicionaría a corto y medio plazo el surgimiento de un potente y amplio nuevo movimiento obrero antifranquista de clase, asambleario y solidario⁶.

A lo anterior ha de añadirse el conjunto de características –algunas de ellas ya apuntadas en epígrafes anteriores– que en su día planteó José Luis Herrero, desde una perspectiva económico-jurídica, de cara a esbozar un sintético marco del modelo de relaciones laborales franquista: a) Crecimiento importante de la productividad del trabajo y del salario real por persona, con una evolución similar tanto en el sector industrial como en el conjunto de la

⁴ Nos remitimos aquí a lo desarrollado en la *Presentación*.

⁵ Véanse, de nuevo, las tesis al respecto de, BABIANO, José, “Las peculiaridades del...”, *op.cit.*. Y en cuanto al debate sobre las posibles definiciones nos remitimos a lo apuntado en el Capítulo 2, *nota 114* así como al trabajo de, TOHARÍA, Luis, “Un fordismo inacabado entre la transición política y la crisis económica: España” en BOYER, Robert (dir.), *La flexibilidad del...*, *op.cit.*, pp. 161-184.

⁶ Sobre todas estas cuestiones nos remitimos a lo apuntado en el apartado “3.3. Debates, lecturas, controversias en torno al *nuevo* movimiento obrero en la España de la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos”.

economía; b) Tendencia marcada al aumento de la masa salarial en la renta global, principalmente, por el impulso de las cotizaciones a la Seguridad Social; c) Tasa de paro con tendencia moderada al alza, pero todavía manteniéndose en niveles relativos bastante bajos, ya que pasó del 1,38% de la población activa en 1970 al 3% en 1974; d) Tendencia a la mejoría de la distribución personal de la renta, perceptible desde comienzos de la década de los *setenta*; e) Predominio de la contratación fija, con modalidades contractuales temporales concentradas, en lo básico, en actividades de temporada o estacionales, y en ramas o servicios productivos tradicionalmente vinculados al trabajo precario por su naturaleza específica; f) Tendencia marcada al debilitamiento de la movilidad forzada del trabajo, tanto funcional como geográfica, como efecto de la reducción de la reserva de fuerza de trabajo existente en la agricultura y la consolidación de categorías y estatus profesionales; g) Tendencia marcada al estrechamiento del abanico salarial a través de la práctica del incrementos lineales de salarios, la integración de pluses y primas en el salario base, los mayores aumentos porcentuales en las retribuciones más bajas, la subida del salario interprofesional...⁷. Factores todos ellos que serían interpretados en términos negativos por la naciente y hegemónica lectura liberal, que se impondrá como salida a la crisis bajo los primeros gobiernos de la Monarquía y los propios ejecutivos democráticos de la UCD.

Si hasta el momento nos habíamos detenido tanto en las características, en las dimensiones, en las consecuencias así como en las diferentes etapas de la crisis del citado modelo de acumulación capitalista franquista en términos generales; lo que corresponde ahora es internarnos en los factores tanto coyunturales como estructurales, que están detrás del fenómeno de destrucción de empleo durante la década de los setenta. Aun a riesgo de repetir o matizar algunas cuestiones ya tratadas. Así pues y como destacarían Lluís Fina y Luis Toharia, en primer lugar, a la hora de explicar este fenómeno histórico-económico, de nuevo, ha de tenerse presente lo siguiente:

«[E]s mucho más importante tener en cuenta la crisis de índole estructural a la que se ve sometida la economía española como consecuencia del agotamiento del modelo de crecimiento ‘desarrollista’ de la década de 1960, en el que la industria creció de forma totalmente desordenada al amparo del elevado proteccionismo del Estado, tanto frente a la competencia exterior como frente a los posibles problemas de relaciones laborales que pudieran plantearles sus trabajadores»⁸.

Dicho esto, la aparición de un alto desempleo –que en modo alguno debe ni puede confundirse bajo el franquismo con la consecución de un “pleno empleo”, como ha sido y es frecuente leer en no pocos trabajos académicos⁹– respondió, en primera instancia, a la simple destrucción de miles de empleos como resultado directo asociado a la crisis estructural del citado modelo. En este aspecto coinciden la mayor parte de los análisis, y las cifras reflejaban una realidad contundente: entre 1977 y 1985, a partir de una serie homogénea de datos, el paro aumentó en 2.278.600 puestos y la caída del empleo afectó a 1.884.000 puestos de trabajo, con lo que la destrucción del empleo vendría a explicar el 84,5% del incremento del paro¹⁰.

Las causas son múltiples y se encuentran estrechamente relacionadas: elevado proteccionismo del mercado interno; el *paternalismo* nacional-católico del marco de relaciones laborales; la manifiesta incapacidad de competir en un mercado internacional liberalizado... Pero sobre todo ha de destacarse un aspecto que la literatura liberal –tal y como venimos insistiendo– ha omitido con demasiada frecuencia: “la primera y principal causa del paro serían

⁷ HERRERO, José Luis, “Las relaciones de trabajo” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del...*, op.cit., p. 50.

⁸ FINA, Lluís y TOHARIA, Luis, “Presentación” en *Las causas del...*, op.cit., p. 7.

⁹ Véase lo apuntado en la *nota 2*.

¹⁰ FINA, Luis, “El paro en España: sus causas y la respuesta de la política económica” en *Las causas del...*, op.cit., p. 17.

la ineficiencia y debilidad empresarial, consecuencia lógica del contexto económico del franquismo y que, en cualquier caso, estaba condenada al derrumbe”¹¹.

Pero como también se remarcó, las lecturas mayoritarias que se imponen en este tiempo, por el contrario, enfocarán sus *miradas* desde otras ópticas e intereses. *Lecturas* que tienen la virtud de *subvertir*, o mejor dicho *acomodar*, las causas del desempleo, desde una perspectiva que centra las responsabilidades de dicho problema en las supuestas “buenas” condiciones laborales, salariales y de trabajo de los propios trabajadores durante el franquismo, empezando por la mayoritaria *condición de fijos* de los mismos. Una tesis teórica que en momento alguno se ha podido demostrar a nivel práctico¹².

Tres fueron los “argumentos” –y, en gran medida, continúan siéndolos– esgrimidos para la realización tanto del *pronóstico* como del *diagnóstico* del problema del desempleo: en primer término, los altos costes laborales especialmente intensos –según la visión liberal, volvemos a remarcar– vía incremento salarial durante los años finales del franquismo y la segunda mitad de los setenta¹³. Ello sumado a un rasgo novedoso –más allá de todo lo anteriormente apuntado–: lo que se denominará –sin ningún tipo de eufemismo– como la *rigidez salarial*¹⁴; en segundo lugar, ese mismo “adjetivo” –siempre leído en términos negativos– se aplicará también al marco de contratación laboral; y en tercer lugar se propugnara el término “flexibilidad” –como sinónimo de liberalización– como remedio a todos y cada uno de los problemas del mercado laboral¹⁵. Concepto, término, *no cuestionable* donde los haya dentro del pensamiento liberal del último medio siglo. Como recordaría uno de los mayores especialistas en un recordado artículo: “Flexibilidad: ¿un debate interesante o un debate interesado?”¹⁶.

Matizadas, de forma previa, no pocas cuestiones de partida: la permanente invocación de la “rigidez” del *Sistema* no ha dejado de ser, en parte, una mera construcción conceptual que se ha llevado a cabo y que respondería a la siguiente sucesión: a) paradigma; b) ideología; y, c) construcción/transformación en un *principio de realidad*. Mientras tanto, se ignorarían –consciente o inconscientemente– otras tantas cuestiones que determinan tanto la “cantidad” como la “calidad” del empleo en un mercado laboral concreto: desde el modelo productivo propiamente dicho, pasando por las condiciones socio-laborales, la correlación de fuerzas capital-trabajo, la formas de organización empresarial del trabajo –todo ello dentro de lo que, o

¹¹ *Ibidem*.

¹² Al respecto, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Delincuentes políticos: biografía de una «generación de militantes antifranquistas»” en id. (coord.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*.

¹³ Nos remitimos aquí al apartado “6.1.3. La crisis económica *diferencial* española: la construcción de las «condiciones necesarias»”.

¹⁴ Por recurrir, de nuevo, José Luis Malo de Molina, éste señalaría al respecto: «La rigidez de los salarios reales a través de una decida orientación de moderación de los costes laborales, que ha pretendido corregir las deficiencias con que se ha venido instrumentando la política salarial en años anteriores». Y añadía en su crítica al sistema de protección tardíamente implantado en España, como «la moderación salarial debe mantenerse, porque la eficacia del ajuste salarial depende, sobre todo, de su persistencia en el tiempo y de la capacidad para ofrecer unas expectativas de moderación salarial en un horizonte dilatado». MALO de MOLINA, José Luis, “Política de empleo y reforma del mercado de trabajo” en id. (ed.), *El debate sobre...*, *op.cit.*, p. 17.

¹⁵ JUAN ASENJO, Óscar de, “Teorías sobre el empleo y desempleo. ¿Explica alguna causa la elevada tasa de paro española?” en TOHARIA, Luis, ROCA JUSMET, Jordi y JUAN ASENJO, Óscar de, *El desempleo en...*, *op.cit.*, p. 49. El mismo autor saldría, asimismo, al paso de las tesis de los autores e instituciones que achacan a los costes laborales la persistencia de los elevados porcentajes de desempleo: «En cierto sentido esta tesis se acerca a una tautología. Si uno parte de la base de que existe un salario de pleno empleo y constata la persistencia del desempleo masivo, a la fuerza ha de concluir que el salario se encuentra por encima del punto del equilibrio. De ahí nuestro esfuerzo por impugnar la idea del salario del pleno empleo. En nuestro modelo postkeynesiano, el efecto del salario sobre el empleo sólo se deja sentir por unas vías indirectas cuya importancia hay que evaluar en cada caso». *Ibidem*, p. 50.

¹⁶ RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “Flexibilidad: ¿un..., *op.cit.*”.

bien, se ha considerado el modelo de producción *flexible/posfordista*, o bien, el *neofordismo* en un debate todavía abierto¹⁷– y concretamente, los nuevos mecanismos de explotación laboral – legal o ilegal como también veremos–. De este modo, está definido, a grandes rasgos, las líneas centrales por donde transcurrirán los debates, las *batallas político-económicas* y los conflictos desde la transición laboral al presente vivido. Aquí una pequeña primera conclusión sobresale: la *estrechez* de las soluciones ensayadas, siempre tendentes a observar, de forma unilateral, los problemas que aquejarían al funcionamiento del mercado laboral.

El problema que se le presenta al investigador como en otros tantos campos del discurrir económico y social, es discernir, separar y catalogar –por este orden y no otro– los fines reales de las políticas económicas implantadas –junto con sus “falacias” y “mitos”–. A lo que se suma –o debería sumarse– el permanente interrogante en torno a la capacidad de generar hegemonía social y política que tienen las propias lecturas mayoritarias y dominantes por extensión. Finalmente a lo anterior debe añadirse una lectura sosegada, a partir de las cifras y datos – contables o no contables– de la realidad laboral. Lo que conlleva, en otras palabras, cuestionar cada uno de los *paradigmas* mayoritarios, hegemónicos o no, dominantes o no.

Así pues, cabe interrogarse, en primer lugar, por la capacidad de generar empleo –ya no de larga duración, temporal o en relación a su calidad– del modelo productivo liberal; en segundo lugar, ¿fue y es el mercado de trabajo español tan rígido como sus detractores no han dejado de insistir desde ha tres décadas?; y/o, ¿fueron y siguen siendo los *costes laborales* los principales culpables de la existencia de un alto desempleo estructural?

Si con respecto a la última pregunta quedó lo suficientemente claro que apenas se puede achacar a las *supuestas* alzas salariales de los años setenta, tanto los problemas de incremento de desempleo, de la alta inflación y de un sinfín de problemas de orden socioeconómico; con respecto a la segunda pregunta también ha prevalecido una lectura hegemónica que ha tendido a asociar en forma de irrefutable “lógica” causal a franquismo con rigidez y a la democracia con flexibilidad/liberalización. Una operación con un *notable* éxito y extendida –sin contradicciones aparentemente– a nivel social pero también a nivel académico–. Pero, ¿qué hay de cierto en dicha tesis rara vez refutada o cuestionada? En otras palabras, ¿qué hay de *realidad* y de *mito*?

Según la lectura académica liberal, y en no pocas ocasiones socialdemócrata-keynesiana, la también “heredada” rigidez laboral estaría fundamentada tanto por las formas de contratación así como por los costes de despido. Ambos factores –siguiendo esta misma lógica– estarían detrás de la incapacidad del mercado de trabajo de crear empleo y, por tanto, de cara a asegurar la recuperación económica¹⁸. Es decir, las principales *sospechas* recaerían en torno la normativa laboral. Una dinámica que pese a las decenas de decenas de reformas laborales – globales o parciales– se mantiene, en la práctica, intacta¹⁹.

¹⁷ Nos remitimos aquí a lo apuntado en el Capítulo 2, *nota 106, nota 107, nota 109, nota 112*, entre otras.

¹⁸ TOHARIA, Luis, “Las diferentes explicaciones del desempleo en España y sus consecuencias para la política de empleo” en *Las causas del...*, *op.cit.*, p. 86. Un estudio que a pesar de tener más de dos décadas de antigüedad, ya se explicaría en qué consistiría el *mito de la rigidez*. En el mismo explicaba como el citado ‘mito’ se había fundamentado en cuatro puntos básicos: a) la estabilidad en el empleo como nota dominante en el franquismo, como contrapartida para el sometimiento político y sindical de los trabajadores; b) los altos costes de despido establecidos en el Estatuto de los Trabajadores de 1980; c) la rigidez que suponía que los despidos colectivos instrumentados a través de los Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tenían que contar con el visto bueno de la Administración; d) y, por último, como la mayor parte de los trabajadores tenían contrato fijo y una antigüedad media superior al resto de los países industriales. A todo ello se le debería unir, entre otras supuestas rigideces, la falta de flexibilidad geográfica.

¹⁹ Véase en su momento el conteo realizado de las reformas laborales en, FUNDACIÓN 1º DE MAYO, *Las reformas laborales...*, *op.cit.*.

No es menor este razonamiento. El mismo se transformaría en el *nodo impulsor* de las sucesivas formas del ET. Y, sin embargo, los datos disponibles indican lejos de estas afirmaciones, las más veces teóricas que fundamentadas en evidencias empíricas contrastadas, una realidad diametralmente opuesta. Por ejemplo, según datos de Juan Torres López, los costes laborales asociados a despidos no llegan al 2 por 100 de los costes laborales totales para los años en que nos movemos²⁰. Además con respecto a la primera cuestión esbozada –la falta de flexibilidad en la contratación de nuevos asalariados por semanas, días, horas, por cuestiones de producción...– sí por algo se ha caracterizado la legislación laboral desarrollada, es por crear un marco de contratación con tal grado de flexibilidad, hasta convertir a la economía española en uno de los mercados más liberalizados de todas las economías occidentales avanzadas²¹.

Es decir, se avanzaría dentro de la “nueva lógica” del crecimiento económico liberal, a través de dos de sus requisitos fundamentales: la creación de las *condiciones necesarias*, y, por consiguiente, en la configuración de un marco jurídico-laboral que dominado por una creciente temporalidad reduciría tanto los costes laborales globales, como los siempre enunciados riesgos por parte empresarial a la hora de contratar a nuevos trabajadores. Lo que no pocos autores *críticos* han denominado como el “nuevo modelo de seguridad económica”²².

A pesar de todo lo anterior ni el desempleo ni el proceso de precarización generalizada de las condiciones laborales –especialmente intenso en los ochenta, en donde se puede situar su *verdadero* origen histórico– junto con otros muchos efectos perniciosos socio-laborales, no propiciarían ni a corto pero tampoco a medio-largo plazo posibles soluciones reales al problema del desempleo. De hecho, la tónica del nuevo modelo de acumulación estaría caracterizada tanto por la incapacidad de recuperar el sistema económico sus tasas de rentabilidad anteriores a la crisis, como por no éste último grave problema citado. Dos fenómenos vinculados profundamente, que a su vez ayudan a explicar y entender mejor la tesis del incremento de las tasas de explotación capital-trabajo.

9.2. Diagnóstico y pronóstico del SERL: la *única política posible* (liberal) en su versión laboral

«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Art. 35.1 de la Constitución de España

«Hay que recordar que no sólo la protección del trabajo, el trabajador y sus organizaciones es el resultado del avance de la civilización hacia la dignificación de la vida humana, sino que está salvaguardada por normas de la más alta jerarquía, que no pueden ser desnaturalizadas sin poner en crisis todo el sistema jurídico y comprometer seriamente la paz social».

Héctor-Hugo BARBAGELATA, *El advenimiento del neoliberalismo*²³.

Como una “revolución liberal de la economía española” definiría el sociólogo Enrique Martín Criado, el impacto económico-social que acarrearía en su momento la reforma del

²⁰ TORRES LÓPEZ, Juan, “Sobre las causas..., *op.cit.*, p. 46. Asimismo, véase, Noticia, “Los empresarios españoles destinaron en 1983 100.000 millones de pesetas para despidos”, *El País*, 13 de marzo de 1984”.

²¹ Al respecto, nos remitimos, a GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «cultura de..., *op.cit.*”.

²² BILBAO, Andrés, *Obreros y ciudadanos...*, *op.cit.*.

²³ BARBAGELATA, Héctor-Hugo, “El advenimiento del..., *op.cit.*, p. 504.

Estatuto de los Trabajadores de 1984²⁴. No obstante, hasta llegar a esa “revolución liberal” se atravesarían un conjunto de fases bien diferenciadas dentro del que bien puede calificarse como el “modelo español de transición laboral”.

De lo que se tratará en las siguientes páginas es, en términos generales, de examinar la importancia que adquieren las decisiones en materia laboral desde los últimos gabinetes franquistas, pasando por los de la Monarquía restaurada hasta los de UCD, con una parada última en el primer año de Ejecutivo socialista. Iniciamos nuestro recorrido en abril de 1976 para concluir el mismo en diciembre de 1983.

Para estas labores, partiremos –a la par que avanzaremos– de lo que, en más de una ocasión, hemos definido como una historia social del Derecho del Trabajo, tanto a través de una visión teórico-normativa como en relación a sus efectos directos tanto sociolaborales como doctrinales. Prestando, por lo demás, una destacada atención a los mecanismos de entrada, permanencia y salida que afectarían a las nuevas cohortes de asalariados. Es decir, nos adentraremos en los cambios que se producen en relación con la normativa jurídico-laboral sobre los contratos de duración definida así como los diversos modelos de inserción destinados, casi en exclusiva, a la integración laboral de la “juventud” trabajadora.

A su vez, dentro de este esquema global, nos detendremos con detalle en el examen que se efectúa por parte del socialismo español al respecto. Vaya por delante, que aunque en un principio se compartirían, a grandes rasgos, una misma política laboral PSOE y UGT, sería a partir de los diferentes episodios que estructuran la citada *transición laboral* hasta la llegada del propio Partido Socialista Obrero Español al Gobierno, cuando, de forma clara, empieza abrirse una brecha en lo que respecta a las consideraciones y enfoques sobre el mercado de trabajo entre ambas organizaciones.

Como destacó Daniel Lacalle lo característico y específico del modelo de relaciones capital-trabajo en España, será la permanente modificación del Estatuto de los Trabajadores desde 1980²⁵. De esta forma, el SERL ha sido, a buen seguro, uno de los enclaves que mayor transformación y reformas de todo tipo, ha experimentado desde el fin del franquismo y el arranque de la transición posfranquista. Y, por tanto, donde mejor se puede visualizar las consecuencias –“deseadas” y “no deseadas”– de la imposición y posterior triunfo de la *nueva lógica del mercado*²⁶.

Dicho esto, resulta casi obligado a efectos expositivos avanzar en la definición de, al menos, cuatro conceptos o expresiones claves. En primer lugar, nos detendremos en una de las posibles definiciones de la “política de empleo”. Uno de esos otros tantos *campos de batalla* que delimitan los avances como las derrotas, según la perspectiva adoptada, en el derecho laboral. En este caso, hemos optado por una definición típica, *neutral*: “Las actuaciones directas de los poderes públicos sobre los elementos y sobre el funcionamiento de trabajo para conseguir unos objetivos”²⁷.

²⁴ MARTÍN CRIADO, Enrique, *Producir la juventud...*, op.cit., p. 146.

²⁵ LACALLE, Daniel, “La clase trabajadora veinticinco años después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas (1980-2005)” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *La clase trabajadora, después...*, op.cit., pp. 183-204.

²⁶ Sobre esta misma cuestión véase el artículo, FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio, “Lógica de mercado y trabajo”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (2003), pp. 235-256.

²⁷ MARTÍN VALVERDE, Antonio, “La política de Empleo: caracterización general y relaciones con el Derecho del Trabajo”, *Documentación laboral*, nº 9, (1983), p. 65. Otra definición nos la proporciona la propia Ley 51/1980, de 8 octubre, *Básica de Empleo* que en su artículo 1 venía a definir la política de empleo como «el conjunto de decisiones dirigidas a obtener los equilibrios entre la oferta y la demanda de trabajo y a proteger las situaciones de desempleo». Por tanto la política de empleo tendría

Muchas más dificultades presenta tanto la definición de *flexibilidad* como de *rigidez*, sin salirnos de momento del terreno estrictamente jurídico. Así es, cuando se tiene presente las polémicas, enfrentamientos y desencuentros sobre esta cuestión en las tres últimas décadas²⁸. Pues como señalara hace tiempo Fernando Valdés Dal-Ré el concepto de flexibilidad “no siempre [estaría] bien definido en sus motivaciones últimas”. En términos generales, podría señalarse como el mismo término, “patrocina la supresión de las limitaciones legales y la necesidad de una flexible adaptación del uso de la mano de obra a los requerimientos cambiantes de la demanda”²⁹. Lo anterior constituye una de las posibles aproximaciones “abiertas”, a partir de la cual interpretar la *flexibilidad cuantitativa*. *Flexibilidad cuantitativa* que ha de relacionarse, a su vez, tanto con las políticas de fomento de empleo, la propia contratación laboral y determinadas formas de distribución del trabajo.

En relación al concepto de *rigidez*, de entrada, advertirse como desde una perspectiva rigurosa como el asunto no radicaría tanto en la ausencia de mecanismos legislativos para contratar o despedir, como en un aspecto que ya señaló hace tiempo el propio Valdés Dal-Ré:

«sino en los efectos que las normas producen sobre las decisiones estratégicas empresariales (inversión y creación de empleo neto, básicamente) [...]. En suma, para enjuiciar el nivel o dosis de flexibilidad de un sistema de relaciones profesionales no basta con saber si hay muchas o pocas normas e indagar su contenido. Lo decisivo es averiguar si la intervención del Estado anula o no la posibilidad de los agentes sociales de adaptar la gestión de la mano de obra a las exigencias productivas»³⁰.

Definidos –o al menos planteada una serie de aproximaciones posibles– los conceptos de la flexibilidad y la rigidez –junto con el de “política de empleo”– el cuarto gran término al que nos interesa acercarnos es el de la contratación temporal. Tomaremos prestada la propuesta esbozada por Ignacio Flórez –desde una perspectiva eminentemente liberal– quien a su vez diferenciaba dos tipos de actuaciones:

«una, como mecanismos flexibilizador que posibilita un mayor ajuste de la cantidad de recursos humanos a la demanda que en cada momento tenga la empresa, y otra, como medida de fomento del empleo, al suponer la temporalidad en sí misma un abaratamiento en costes (ante una eventual salida del empleo mediante la no renovación o extinción de los contratos de duración determinada) y al existir múltiples actuaciones de los poderes públicos dirigidas directamente a incentivar económicamente dicha contratación. Dicha incentivación se lleva a cabo por medio de la reducción de costes de la mano de obra, tanto directos como indirectos»³¹.

Sin salirnos de las cuestiones más básicas, también se ha de tener presente como la función del Derecho del Trabajo (DT) en su concepción inicial, preveía regular las relaciones laborales partiendo de la base de la subordinación del trabajo al capital, y constituyéndose, de este modo, en un derecho protector del trabajador. Con la reformulación y la introducción de la *nueva lógica del mercado*, el DT –como tendremos oportunidad de observar nítidamente– va a sufrir una transmutación en su concepción, ya que a sus funciones primigenias se sumarán la de posibilitar, al mismo, tiempo, la *máxima eficiencia del proceso productivo*. A partir de lo cual el propio DT entraría en una encrucijada que, en opinión de Andrés Bilbao, se resuelve “en un marco completamente objetivado, en el que las garantías sólo pueden mantenerse en cuanto que no son incompatibles con la condición que la hace posible, la viabilidad económica de la

tres funciones: a) la ordenación de la colocación de los trabajadores; b) el fomento del empleo; c) la protección de los desempleos.

²⁸ Nos remitimos aquí al debate en su momento planteado en el apartado “2.2.2. El Derecho del Trabajo y los economistas «laboralistas»”.

²⁹ VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, *Las relaciones laborales...*, op.cit.. Una lectura cercana a las conocidas tesis mantenidas en su momento en el *Informe Dahendorf*. Véase, al respecto, lo apuntado en el Capítulo 7, nota 558.

³⁰ Ibídem, pp. 27-28.

³¹ FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal...*, op.cit., p. 40.

empresa”³². He aquí una de las claves de la metamorfosis del Derecho del Trabajo cada vez más desnaturalizado, más mercantilizado, más convertido, en suma, en un *Derecho del Empleo*.

Tampoco ha sido extraño como desde determinados sectores académicos o foros económicos, cuando no directamente la propia Administración –que en las décadas en que nos movemos, se convertiría, de hecho y por derecho, en el principal agente desregulador del SERL– se haya achacado al carácter *tutelar y garantista* del DT, buena parte de la culpa de la situación de crisis del empleo. La supuesta causa a probar residiría en lo siguiente: impedir la búsqueda “eficacia” en el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Todo ello a través de las consabidas acusaciones en donde la *maldición* de la rigidez ha jugado un papel central. La opinión al respecto de José Luis Malo Molina –uno de los *especialistas liberales* siempre citados y con una prolífica bibliografía al respecto³³– sobre las consecuencias de este proceso resulta muy significativas al respecto:

«Las contradicciones y conflictos entre la legislación tutelar y garantista y los requerimientos del mercado de trabajo se han tendido a manifestar en un creciente deterioro de las condiciones generales de funcionamiento de los mercados de trabajo»³⁴.

Por el contrario otros especialistas han venido a asentar premisas menos “fuertes” y por ende, más clarificadoras. Este es el caso de la posición defendida por el Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, Joaquín García Murcia, cuando afirmaba:

«[C]uesta trabajo aceptar que el marco legal y, en concreto, el marco jurídico-laboral tenga una incidencia tan decisiva en el desenvolvimiento del sistema económico para erigirse en locomotoras o freno de la economía. El papel del Derecho en la economía, y del Derecho del Trabajo en particular, afortunada o desgraciadamente es sin duda mucho más modesto. Que las normas estén presididas por unos u otros criterios de regulación, y que se asienten en una u otra orientación, seguramente tiene repercusiones en el plano económico, como en otros aspectos de las relaciones sociales; pero probablemente esas repercusiones no alcancen tal intensidad como para achacarles el origen de los problemas o disfuncionalidades del sistema»³⁵.

Lo dicho, en cualquier caso, no ha sido obstáculo para que se hayan ceñido todas y cada una de las sospechas cuando no culpabilizaciones sobre los *déficits laborales* en España, al carácter garantista del DT, como ya se ha mantenido líneas atrás. Una interpretación que, en suma, plantea una sugerente hipótesis a tener en cuenta: los derechos y condiciones laborales conquistadas por el movimiento obrero y sindical se habrían convertido en un impedimento para el *funcionamiento liberal* del mercado de trabajo. La solución: volver –o si se prefiere– retroceder a la situación previa.

Por lo demás, y en lo que respecta a la legislación laboral en España, desde el inicio del proceso democratizador se han atravesado tres grandes etapas –en términos similares a la de sus homólogas europeas– una vez que el debate sobre la flexibilidad se ha convertido en fenómeno casi-universal: a) la *legislación laboral de la emergencia*; b) el *derecho en crisis*; c) la *legislación de la flexibilidad*. Todas y cada unas de ellas se concatenan, de forma sucesiva, con los diferentes periodos económicos por los que atravesaría el país. No obstante, otros autores han preferido aunar estas etapas bajo el rótulo del proceso de la *flexibilidad adaptativa*, aunque ciertamente a costa de desdibujar un proceso histórico con sus fases y sus tiempos³⁶.

³² BILBAO, Andrés, “La posición del trabajo y la reforma del mercado de trabajo” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales...*, op.cit., p. 316.

³³ Véase lo apuntado en el Capítulo 2, nota 10.

³⁴ MALO de MOLINA, José Luis, “Política de empleo y reforma del mercado de trabajo” en id. (ed.), *El debate sobre...*, op.cit., p. 14.

³⁵ GARCÍA MURCIA, Joaquín, “Perspectivas jurídicas de la reforma del mercado de trabajo” en MONEREO PÉREZ, José Luis (coord.), *La reforma del...*, op.cit., p. 24.

³⁶ VALDÉS DAL-RE, Fernando, *Las relaciones laborales...*, op.cit., p. 41.

Así pues, la introducción de la flexibilidad en los ordenamientos jurídicos, ha afectado a la propia base esencial así como a las sus propias funciones del DT. A través de la imposición de la *nueva lógica del mercado* en el SERL, el papel de promotor político desarrollado por los académicos liberales y las fuerzas económicas dominantes, han terminado por constituirse en una de las claves para interpretar como han prevalecido determinadas posiciones. A esto se suma, la evolución estratégica de los *sindicatos de clase*, quienes pasarían de una fase *ofensiva* a otra *defensiva* en relación al binomio aceptación/oposición a la flexibilización laboral. Pero ante todo, el *rol* determinante lo han jugado los mismos poderes públicos, quienes, líneas generales, han favorecido la “adopción” de la flexibilidad como el remedio a todos los males, con muy escasas resistencias. Convirtiendo la flexibilidad en el *Leviatán* de las sociedades postindustriales³⁷.

En última instancia, la consecuencia de todo este proceso ha sido retorno a los principios liberales que habían caracterizado al Derecho del Trabajo en su primera fase. Tal y como afirmaron en un conocido artículo María Emilia Casas, Antonio Baylos y Rafael Escudero, su dirección siempre ha estado clara:

«Ni que decir tiene que las teorizaciones más extremas sobre esta fase de la legislación laboral retornan a beber en las fuentes de interpretaciones contractualista común, de obediencia civilista, del Derecho del Trabajo, propia del inicial capitalismo liberal y competitivo, cuya función no ha sido tradicionalmente otra que la de asegurar al empresario los márgenes de poder legal necesarios para gobernar el orden a los procesos productivos, concediendo lo menos posible a los sometidos. Sin embargo, a diferencia de aquellos viejos teóricos contractualistas, los nuevos solicitan una intervención del Estado en apoyo de sus objetivos económicos y jurídicos, en apoyo de la autonomía individual y en detrimento de la colectiva»³⁸

A partir de este complejo proceso –aquí tan sólo delineado en sus líneas básicas– se han terminado por recuperar múltiples principios que las legislaciones de los países occidentales en materia laboral habían desterrado. Entre otros, y refiriéndonos al caso español, retorna en estos años la idea de la *idea de la ajenidad*, que viene a señalar que el resultado de la empresa no afecta en nada al trabajador. Todo lo cual ha conducido a asentar la “idea de que el bienestar del trabajador depende también de la salud económica de la empresa, de su grado de competitividad y eficiencia o de que no cabe desconocer el distinto valor de lo producido, entre otros aspectos”³⁹.

Por estos caminos entrecruzados se han llegado a establecer tres modelos “ideales” de flexibilización”, que bien podrían resumirse de la siguiente manera en base a los diferentes esquemas en su día presentados por Antonio Martín Valverde y Fernando Valdés Dal-Ré, respectivamente:

- a) La *flexibilización neoliberal* caracterizada por defender una desregulación radical del mercado de trabajo, a través de la supresión de la legislación estatal que fijan las condiciones mínimas de trabajo.

³⁷ Ibídem, p. 38. El problema tal como acertadamente ha indicado el mismo jurista es la posición dominante de ciertos autores más favorables a la flexibilidad, que han tendido a hacer un uso de la misma, «en un sentido unilateral, de suerte que sus reivindicaciones a favor de una gestión más elástica de la mano de obra suelen presentarse como un marco –por decirlo evocando nociones propias de la teoría de juegos– con contraprestaciones de grado cero. Se reclama la moderación salarial, la libertad de contratación y de despido, la reducción de los costes laborales o la movilidad funcional. Pero estas aspiraciones flexibilizadoras, solicitadas en nombre de la eficiencia y racionalidad económicas, como medio de creación de empleo y de fortalecer la competitividad de las empresas, no suelen ir acompañadas de contrapartidas». Ibídem, p. 38.

³⁸ CASA BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y..., *op.cit.*, p. 318.

³⁹ RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, VALDÉS DAL-RÉ, Fernando y CASAS BAAMONDE, M^a Emilia, “Diez años de «Relaciones Laborales»”, *Relaciones Laborales*, n° 1-2, (1996), p. 7.

- b) El *liberalismo colectivo* o *laissez-faire colectivo*, que se diferenciaría del anterior al compensar la pérdida de las mínimas condiciones del trabajo, a cambio de la potenciación de los instrumentos para la negociación colectiva.
- c) *Flexibilización de adaptación o de ajuste a la crisis*, que estaría marcada por la introducción de sucesivas reformas que disminuyen el carácter protector de la legislación laboral, sin alterar sustancialmente los fundamentos teóricos y las estructuras normativas⁴⁰.

Para la mayoría de los autores citados el caso del SERL habría que incluirlo en el tercer “tipo ideal de flexibilidad”. Pero como veremos las opiniones no han sido tan concordantes una vez que se profundiza en el debate. En todo caso, las anteriores posiciones obvian de plano un elemento consustancial al marco de las relaciones capital-trabajo. En tanto dependiendo de una fase u otra, el tipo de flexibilidad por el que se ha optado termina revelando la *real* correlación de fuerzas entre capital y trabajo. Lo que traducido, en términos históricos, abre la hipótesis de la verificación de cómo la flexibilización del SERL se terminará instrumentando como un *arma legislativa*, destinada a modificar radicalmente tanto el marco laboral como orientada a subvertir la cohesión interna de la clase trabajadora procedente de la década de los setenta. Otros dos requisitos claves para el triunfo de la *nueva lógica* económica.

De cualquier de las formas, y como señalara Héctor-Hugo Barbagelata, la simple existencia de mecanismos flexibilizadores no necesariamente se han de atribuir a una ideología neoliberal. Como ya constataremos en el caso de la estrategia de la modernización del primer Gobierno socialista, se terminaría apostando por,

«reconocer la influencia del neoliberalismo en aquellas situaciones en que la flexibilidad pasa a ser un objetivo de la política económica y, desde luego, en los procesos de desregulación y en todos los casos en que es visible que se procura subvertir el sistema de relaciones laborales progresivamente universalizado luego de un trayecto secular»⁴¹.

No se trata, por tanto, de llevar a cabo un mero “proceso de etiquetaje”. El problema radica en que las tesis neoliberales terminarían siendo asumidas como propias por los poderes públicos. *Asumidas* como *interiorizadas* como las “únicas políticas posibles”. Así, en el caso del primer Gobierno socialista las propias tesis liberales serían acompañadas de una contundente justificación, imponiéndolas como “principios racionales” a los que no cabía plantear oposición y menos resistencia en tanto no existía en el horizonte inmediato alternativa viable⁴². Nos encontraremos –como una vez más ha insistido Héctor-Hugo Barbageleta– en que el apoyo de los diferentes ejecutivos a estas tesis, ha hecho crecer,

«en los empresarios la convicción de que al sostener sus puntos de vista ya no están tratando de hacer primar posiciones que interesan sólo a ellos, sino procurando que se acojan las soluciones que la ciencia económica aconseja y que aparejarán beneficios para toda la sociedad»⁴³.

⁴⁰ VALDÉS DAL-RE, Fernando, *Las relaciones laborales...*, *op.cit.*, p. 39; MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la...*, *op.cit.*, pp. 33-34.

⁴¹ BARBAGELATA, Héctor-Hugo, “El advenimiento del...”, *op.cit.*, p. 500. Y como el mismo autor afirmaba: «es innegable que [...] el abandono del intervencionismo en materia social y la convicción de la ineffectividad y, más aún, de los efectos perversos de esa política, no pueden sino conducir a la desaparición del Derecho Laboral o, cuando menos, a una reducción cuantitativa de sus dispositivos protectores, de tal magnitud que salta a lo cualitativo». *Ibíd*

⁴² Nos remitimos aquí al apartado “6.2.1.1. Principios de realidad: el *Programa Económico a Medio Plazo*”.

⁴³ BARBAGELATA, Héctor-Hugo, “El advenimiento del...”, *op.cit.*, p. 497.

9.3. Breve historia de la contratación temporal en España durante la transición posfranquista. *Del Derecho del Trabajo de la crisis a la institucionalización de la temporalidad (1976-1982/1983)*

Recorremos de forma sintética en los siguientes epígrafes los principales acontecimientos del discurrir flexibilizador. Todo ello a modo de una “historia social de la contratación temporal” en la España contemporánea. En este capítulo, en concreto, nos limitaremos a lo que acontece entre 1976 a 1983. A saber, desde la aprobación de la LRL hasta la publicación en el BOE del Real Decreto 3238/1983.

En esta propuesta de recorrido histórico, normativo y económico –incluido claro está el político– lógicamente se entrecruzarán otros elementos de análisis: desde las estrictas negociaciones que conducirían a los primeros pactos sociales, el papel de los agentes sociales y del Gobierno, pasando por las movilizaciones laborales de estos años –en donde, justamente, las mantenidas contra el Estatuto de los Trabajadores, entre otras, llegaría a copar la *agenda* de buena parte del movimiento obrero durante largos meses– hasta detenernos por las lecturas principales en torno a los cambios habidos en este tiempo sobre el DT.

Por más que resulte obvio advertirlo, no se puede pasar por alto como el principal y más importante cambio de este tiempo lo constituiría la legalización de los sindicatos de clase y la consiguiente apertura de un nuevo periodo de libertad sindical. Elementos todos ellos vinculados con la rápida transformación por la que atraviesa el ordenamiento jurídico-laboral en España durante la transición posfranquista. No más de seis años repletos de acontecimientos en una doble marcada dirección: primero, el proceso de democratización del SERL, y en segundo lugar, la flexibilización del ordenamiento jurídico-laboral.

Al mismo tiempo, se pretende dejar constatado –a modo de una de nuestras principales hipótesis explicativas– como los cambios en torno a la normativa de la contratación temporal, en suma, no deja de ser más que una de las principales expresiones de la correlación de fuerzas entre capital-trabajo como se ha mantenido líneas atrás. Pero también de la fortaleza o no de los diferentes gobiernos en cada momento preciso, de cara a seguir la aquí *misión histórica flexibilizadora-liberalizadora* del SERL.

9.3.1. De la Ley de Relaciones Laborales a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. *Los arduos inicios de la flexibilización (octubre 1976-marzo 1980)*

Tras la muerte del dictador se mantenía vigente Ley de Contrato de Trabajo de 1944, que establecía que los contratos laborales podían fijar libremente su duración⁴⁴. En cualquier caso, la contratación indefinida sería la opción predominante durante este periodo, “hasta tal punto que pudo decirse de éste que constituía la regla general”⁴⁵.

Dentro de este ordenamiento, la contratación temporal habría de quedar reducida a un conjunto de actividades determinadas (por temporada, obra o servicio, y otros trabajos de carácter temporal) a lo que se sumaban cuestiones como la ordenación de las estructuras profesionales sobre la base de un rígido sistema de categorías, y ciertas medidas antes que legislativas estrictamente económicas que dificultarían, en extremo, el despido en la práctica. A todo ello, el único dispositivo vigente para la inserción de los jóvenes en el mercado lo constituía un *contrato de aprendizaje* establecido en la LCT en claro desuso y con claras reminiscencias gremiales. Contrato caracterizados por el *paternalismo* y por una *concepción de moralidad pública*, y que, además, no tendría un uso masivo.

La constatación de estas lógicas evidencias se constituyó en su día en el punto de arranque de las consabidas acusaciones acerca del carácter rígido, paternalista e intervencionista del marco de relaciones laborales franquista. Como siempre las anteriores hipótesis ideológicas

⁴⁴ Libro I y II de la Ley de Contrato de Trabajo, aprobada por Decreto de 31 de marzo de 1944.

⁴⁵ ALONSO OLEA, Manuel, *Derecho del Trabajo...*, op.cit., p. 151.

antes que normativas contienen una parte de verdad y otra de “no verdad”. En cualquier caso, aquel entramado antidemocrático sería desmontado en los años siguientes de manera gradual y paulatina, y pese a lo cual no se dejaría de repetir las mismas “consignas” hasta el propio presente, lo que en parte aclara –como veremos– la dirección pero también los objetivos reales del *dogma flexibilizador/liberalizador*.

Desde este punto de partida nos toca recorrer la historia, mejor dicho las múltiples historias, que están detrás de la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales hasta el Estatuto de los Trabajadores, incluidas las decenas de las normativas menores –y no tan menores– que se publicarían en el BOE en este *tiempo de transiciones*. Unos años que estarán marcados por la provisionalidad de las medidas, lo que se traduciría en su escasa vigencia temporal. Unos primeros pasos que marcarían, a la postre, el único rumbo del SERL. Así pues, y a partir de 1976 con los primeros gobiernos de la Monarquía todavía franquista y cuando todavía no se avecinaba con claridad la instauración de un *régimen parlamentario de democracia de mercado*, el Derecho del Trabajo va a experimentar una profunda mutación tanto en la ordenación de sus fuentes como en su ordenación normativa.

En un contexto dominado por las primeras como agudas evidencias de crisis económica, el mismo también estaría presidido por una fuerte conflictividad laboral, que más allá de que sus altas cifras en número de horas pérdidas y otros datos estadísticos⁴⁶, marcarían –como probablemente en ningún otro periodo de la reciente historia contemporánea– la agenda de los cambios políticos y sociales. Como nos ha recordado Manuel Palomeque, “la democracia llegó de la mano del «compañero de viaje histórico» del Derecho del Trabajo: la crisis económica”⁴⁷.

Entramos, pues, en lo que Manuel Alonso Olea con acierto definiría como la etapa del *Derecho del Trabajo de la crisis*⁴⁸. Periodo corto pero realmente intenso en cambios legislativos. Un tiempo en que lo *político* se impuso sobre lo *económico*. Pese a lo anterior, la transición sindical frente a la política ha tendido a ocupar un lugar menor, secundario en otras palabras. Ahora bien, no puede minusvalorarse lo que Fernando Valdés Dal-Ré llamaría el proceso “de cambio sindical” –antes que de “reforma sindical”–. Es decir, el proceso conquista de libertad sindical que tiene en la legalización de los sindicatos su principal exponente⁴⁹. Con fundada razón Marcelino Camacho siempre se referiría a los sindicatos como *los parientes pobres de la transición*⁵⁰.

Precisamente, en aquel *tiempo de transiciones* la cuestión sindical se convertiría en una de las más extensas a nivel temporal como también conflictivas. Desde 1976 a 1985, con la aprobación de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, *de Libertad Sindical* –punto de inflexión final de la citada transición laboral– se extiende un periodo de rápidos cambios, que tiene como hitos innegables, primero, la redacción del artículo 28.1⁵¹ de la CE, sin olvidarnos,

⁴⁶ Véanse aquí los abundantes datos manejados en el apartado “11.2.1. El mapa del conflicto obrero: datos, interpretaciones y demás evidencias del «caso español» en perspectiva internacional”.

⁴⁷ PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos, “Un compañero de..., *op.cit.*, p. 15. De hecho, la adaptación a la crisis económica supuso una auténtica *revolución* en el interior del Derecho del Trabajo, ya que no sólo transformó, a nivel global, su aparato jurídico, sino que dio lugar a la aparición «nuevas ideas o criterios de regulación, que impregnan progresivamente a todos los elementos o componentes del sistema jurídico». MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la..., op.cit.*, p.18.

⁴⁸ ALONSO OLEA, Manuel, *Derecho del Trabajo...*, *op.cit.*, p. 18.

⁴⁹ VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Treinta años de libertad sindical: en los orígenes del cambio sindical” en id. (dir.), *30 años de libertad sindical*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007, p. 8.

⁵⁰ CAMACHO, Marcelino, *Confieso que he..., op.cit.*.

⁵¹ «28.1.Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y

del artículo del 28.2 de la CE⁵² así como el Título II y el Título III de la Ley 8/1980⁵³. Pero hasta llegar a aquellos artículos constitucionales, el camino emprendido no sería fácil en absoluto. De “complejo, arduo y tortuoso”, de nuevo, lo ha definido Valdés Dal-Ré, quien ha destacado las considerables “dosis de improvisación” al respecto de cómo se llevaría a cabo tal proceso. Asimismo en dicho proceso histórico se hace necesario distinguir dos vías:

«El primero irá dirigido, en lo esencial, a reconocer el ejercicio de las manifestaciones organizativas de la libertad sindical, tanto de las individuales [...] como de las colectivas [...]. El segundo cauce, por su parte, perseguirá el desmantelamiento y liquidación del amplio, disperso, vasto y, en buena medida, opaco entramado organizativo formado por el sindicalismo vertical y autoritario levantado por el régimen franquista».

Los principales sindicatos del país serían legalizados un 28 de abril de 1977, a partir de la Ley 19/1977, de 1 de abril, *sobre regulación del derecho de asociación sindical*⁵⁴. Por cierto, también aquel mismo día se prohibiría la manifestación de los actos previstos para celebrar el 1º de Mayo, en todo un ejemplo de los muy parciales avances democratizadores. De hecho, la CNT todavía tendría que esperar cerca de diez días para ser legalizada, convirtiéndose, por esta vía, en último sindicato histórico en ser legalizado.

Pero como ha indicado, una vez más, Valdés Dal-Ré por el camino que media entre el Real Decreto-Ley 19/1976, de 8 de octubre, *sobre creación, organización y funciones de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales*⁵⁵ hasta la publicación del Real Decreto 1304/1977, 10 de junio, *sobre composición y funciones de la Comisión de Transferencia de la Administración Institucional de Servicio Socio-Profesionales*⁵⁶, nos encontramos ante un tiempo marcado por un “hiperactivismo normativo” en donde “cada quince días se aprueba una Ley, un Real Decreto-Ley o un Reglamento o se adopta un Instrumento de Ratificación de un Convenio Internacional”⁵⁷. Un proceso que iría derogando, paso a paso, todas y cada una de las normativas que impidieron hasta el último suspiro del régimen el mero hecho

regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato».

⁵² «28.2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».

⁵³ Nos referimos, respectivamente, al “Título II. De los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa” y del “Título III. De la negociación y de los convenios colectivos” del Estatuto de los Trabajadores. Un completo estado de la cuestión en, PALOMEQUE, Carlos, “La libertad sindical colectiva” en VÁLDÉS DAL-RÉ, Fernando (dir.), *30 años de..., op.cit.*, pp. 34-49. Trabajos también de referencia en: CRUZ VILLALÓN, Jesús, “El reconocimiento legal de la representación y la acción sindicales en la empresa” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Libertad Sindical: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto*, Madrid, Tecnos, 1985; SÁEZ LARA, Carmen, *Representación y acción sindical en la empresa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992; y, LUJÁN ALCARAZ, José, *La acción sindical en la empresa: marco legal y desarrollo convencional*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003.

⁵⁴ Aquí también consúltese, lógicamente, el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, *sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho sindical* [B.O.E. 28 de abril de 1977].

⁵⁵ Decreto-Ley 19/1976, de 8 de octubre, *sobre creación, organización y funciones de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales* [B.O.E. 27 de octubre de 1976].

⁵⁶ Real Decreto 1304/1977, 10 de junio, *sobre composición y funciones de la Comisión de Transferencia de la Administración Institucional de Servicio Socio-Profesionales* [B.O.E. 13 de junio de 1977].

⁵⁷ VÁLDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Treinta años de libertad sindical: en los orígenes del cambio sindical” en id. (dir.), *30 años de libertad..., op.cit.*

de sindicarse libremente. Todo ello, por más que nos faltarán en los últimos años del régimen dictatorial algún que otro falso ejercicio de pura demagogia legislativa –como sucedería en otras parcelas políticas– de cara a lavar su *faz* con normativas tan anti-democráticas y autoritarias, como sería la promulgación de la Ley Sindical 2/1971, de 17 de febrero⁵⁸.

De esta forma, el punto de arranque de la transformación del Derecho del Trabajo en España no se puede desligar del anterior proceso. Si la *contratación temporal* es la respuesta liberal a la crisis económica; la democratización de la vida sindical constituye la oportuna respuesta de la transición política de cara a garantizar la *paz social*. Así pues, nos encontramos con caminos entrecruzados e interconexiones mutuas, en donde en ocasiones se hace complicado distinguir los diferentes fenómenos históricos en juego.

En relación a la historia de la contratación temporal contemporánea, el citado *punto de arranque* ha de situarse con la publicación de la LRL⁵⁹. Una normativa del 8 de abril de 1976 que permanecerá vigente –en términos exclusivamente jurídicos– hasta el 15 de marzo de 1980. Es decir, se trata de una Ley de corta duración real y efectiva, pues rápidamente comenzaría el denominado periodo de las *cuñas flexibilizadoras*.

Aprobada durante el primer Gobierno de la Monarquía (diciembre 1975-julio de 1976) –por tanto nos encontramos con una norma no democrática por obvio que, de nuevo, resulte insistir en esta obviedad– y con el infatigable José Solís como Ministro de Trabajo (diciembre 1975-julio 1976), acompañado de Juan Miguel Villar Mir en Economía (diciembre 1976-julio 1976) la citada Ley de relaciones Laborales, en primer lugar, tendrá un claro objetivo político: ganar tiempo, apaciguar la situación social y tratar de dar un *retoque* –sólo eso– reformista a la legislación franquista laboral, sin ningún planteamiento democrático de fondo.

No pueden desligarse los motivos de tal legislación de la oleada conflictiva de los primeros meses de 1976 así como de la respuesta sanguinaria del régimen dictatorial a los mismos⁶⁰. Éxitos políticos y organizativos como la huelga de enero de 1976 en Madrid –10 millones de horas perdidas, 300.000-350.000 trabajadores implicados, incluida la militarización de los servicios públicos básicos–; pasando por los sucesos de Vitoria tres meses más tarde; hasta la proclamación y el desarrollo de numerosas huelgas regionales, comarcales, locales por

⁵⁸ Ley Sindical 2/1971, de 17 de febrero [B.O.E. 19 de febrero de 1971]. Entre otras normativas en este mismo sentido deberían destacarse –sin ánimo ni posibilidad de exhaustividad– las siguientes: Real Decreto 1048/1977, de 13 de mayo, *de desarrollo de los procedimientos judiciales establecidos en la Ley 19/1977, de 1 de abril* [B.O.E. 14 de mayo de 1977]; Real Decreto-Ley 31/1977, de 2 de junio, *sobre extinción de la sindicación obligatoria, reforma de estructuras sindicales y reconversión del organismo autónomo Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales* [B.O.E. 8 de junio de 1977]; Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, *por el que se establecen normas para el ejercicio del derecho de asociación sindical de los funcionarios públicos* [B.O.E. 2 de julio de 1977]. Y sobre este proceso consúltense, entre otros muchos trabajos jurídicos, los siguientes: CASAS BAAMONDE, M^a Emilia, “Reflexiones sobre la reforma sindical (julio 1976 a julio 1977)”, *Cuadernos del Derecho del Trabajo*, n^o 3, (1977), pp. 199-251; ALONSO OLEA, Manuel, “Libertad sindical y derecho de sindicación” en id. [et al.], *Sindicatos y relaciones colectivas de trabajo*, Murcia, Ilustre Colegio de Abogados, 1978, pp. 9-31; o también, SASTRE IBARRECHE, Rafael, *Derecho sindical y Transición política: un estudio de la jurisprudencia laboral en la etapa democrática, 1975-1978*, Madrid, Tecnos, 1987. Y, en concreto, YSÁS, Pere, “La movilización obrera” en *Disidencia y subversión...*, *op.cit.*, pp. 75-121.

⁵⁹ Ley 16/1977, de 8 de abril, *de Relaciones Laborales* [B.O.E. 21 de abril de 1976].

⁶⁰ Primero, nos remitimos aquí a, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*, junto con lo apuntado en el apartado “3.3. Debates, lecturas, controversias en torno al nuevo movimiento obrero en la España de la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos” y lo también apuntado en el Capítulo 4, *nota 181 y nota 258*.

todo el país, algunas de ellas de *tintes revolucionarios*⁶¹, llevarían –por aportar un dato concreto que a las clases dominantes les preocupaba especialmente– a que sólo en los tres primeros meses de ese mismo año se alcanzara todo un record histórico en número de huelgas: 17.731 aproximadamente con 150 millones de horas perdidas de trabajo. Unos 3.500.000 trabajadores participarían en este ciclo expansivo de lucha. Todo un mensaje de que el movimiento obrero – principal activo y motor de aquel ciclo de protestas– no cejaría en su empeño hasta conquistar un mínimo conjunto de derechos mínimos e imprescindibles que le garantizarán su inserción democrática en la vida sociolaboral.

En este mismo contexto histórico se redactaría la LRL. Por muy insensible a la situación social que pudiera llegar a ser el Gobierno de Arias Navarro, había realidades que no se podían obviar. Así sería. Dicho marco histórico quedaría ampliamente reflejado en su *Exposición de Motivos*. Tras anunciar que la “Ley de Relaciones Laborales constituye un propósito de actualización y perfeccionamiento de aspectos fundamentales de la normativa de trabajo”, dejaba apuntados un par de mensajes: “La Ley no puede ni debe olvidar el futuro”, al mismo tiempo que se indicaba como no había llegado el momento de avanzar hacia un posible Código del Trabajo –en clara referencia al caso italiano⁶²–:

«No parece adecuado al momento ni a la naturaleza dinámica del Derecho Laboral abordar un código; tampoco ha parecido adecuada una Ley de Bases, con todo un procedimiento de elaboración dilata. Finalmente, no cabe ya reducirse en esta época, a los estrechos límites de una Ley de Contrato de Trabajo»⁶³.

Solís, un falangista de “toda la vida” que una tras otra ocasión había visto fracasar sus *intentos de apertura*, como cuando se reuniría con una delegación de CCOO con el fin *atraerles* a la disciplina del Sindicato Vertical, allá por las elecciones sindicales de 1966⁶⁴; aplicaría todo

⁶¹ Véase, por ejemplo, lo que aconteció en Baix Llobregat y Sabadell por aquellas fechas, que a juicio de Xavier Domènech, «significaron la visualización de la ruptura política en el ámbito local». DOMÈNECH, Xavier, “El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo. Revisado” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (Coord.), *La clase trabajadora...*, op.cit., p. 77.

⁶² En concreto nos referimos a la Ley nº 230/1962.

⁶³ La LRL no era Código ni un Estatuto del Trabajador aunque guardaba sus similitudes al respecto, a través de sus diez Secciones. De hecho, en la Disposición Final Segunda se podía leer: «El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical y dictamen del Consejo de Estado, aprobará, en el plazo máximo de un año, un texto refundido que comprenda las normas con fuerza de Ley sobre relaciones laborales». Ley 16/1976, de 8 de abril, *de Relaciones Laborales*

⁶⁴ Nunca se le olvidó a Marcelino Camacho una reunión con José Solís –Ministro Secretario General del Movimiento (1957-1969)– poco antes de la ilegalización de CCOO cuando le señaló: «‘Qué me estáis haciendo los de Comisiones’». Testimonio, CAMACHO, Marcelino: Colección, “Biografías obreras y militancia sindical en CCOO”, Archivo de Historia del Trabajo. Fundación 1º Mayo, 2002. Un Marcelino Camacho que a partir de esa fecha apenas estaría fuera de Carabanchel hasta la muerte del dictador: «El 1 de marzo de 1967 el Tribunal de Orden Público decreta el encarcelamiento de Marcelino Camacho acusado de promover con otros la manifestación de los obreros del metal [...]. Pero se inicia, de hecho, una larga privación de libertad que no se acabará hasta después de la muerte de Franco, con un paréntesis de ciento cinco días, en 1972». MELIÀ Josep, *Marcelino Camacho. Perfil humano y político*, Madrid, Cambio 16, 1977, pp. 25-26. La propia María Luisa Suárez insiste también en la existencia de ese periodo de *semi-tolerancia*: «Solís Ruiz fue el que les autorizó, el que les permitió y formaron el grupo ese de enlaces y jurados del metal. Enlaces del metal, esa comisión tan importantísima [...]. Él estaba presente. Creo que incluso hay un documento que yo salvé y que luego se lo entregué a Marcelino y no sé qué pasaría con él». SUÁREZ ROLDÁN, Mª Luisa: Colección “Biografías obreras y militancia sindical en CCOO”, Archivo de Historia del Trabajo. Fundación 1º Mayo, 2002. Véase también el testimonio de, ARIZA, Julián: Colección “Biografías obreras y militancia sindical en CCOO”, Archivo de Historia del Trabajo. Fundación 1º Mayo, 2002. Más allá de la bibliografía citada hasta el momento, véanse: MATEOS, Abdón, “Comunistas, socialistas y sindicalistas ante las elecciones del sindicato vertical 1944-1967”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea*, nº 1, (1988), pp. 379-412; SOTO CARMONA, Álvaro, “Auge y caída de la Organización Sindical Vertical Española”,

su *ideario reformista* en la LRL. En cierta parte, fue su gran momento como legislador por más que le llegara aquella oportunidad en su última etapa política. Su influencia, pues, es innegable en este sentido.

Así se puede explicar más de una cuestión de forma como de contenido. Se destaca, por ejemplo, en la propia *Exposición de Motivos* un conjunto de “hitos” a tener presente y que sin constituir un “giro radical” otorgaría a la citada normativa un “halo de progresismo”. Por un lado, se elevaba la edad laboral mínima a los “dieciséis años” (artículo 1), estableciendo además una serie de medidas protectoras relacionadas con el trabajo de jóvenes. Pero ante todo, la gran “innovación” de la LRL de cara a este sector de la población vendría con la introducción del contrato en prácticas (artículo 8). No terminan ahí los avances. Se iguala en condiciones la capacidad trabajar de la “mujer casada” con la del varón. Se habla, así, de la consagración del “principio de igualdad” (artículo 10). Pasos todos ellos que aunque tan sólo figurasen en términos teóricos y/o simbólicos, constituían apreciables novedades.

También a “título de novedad” –se especificaba– el “descanso continuado de la tarde del sábado y la jornada completa del domingo, estableciéndose, en cualquier caso, un mínimo de treinta y seis horas semanales ininterrumpidas”. Puesto a la labor también se llega a citar a la OIT a la hora de la duración mínima de las vacaciones (21 días)⁶⁵.

No obstante, lo realmente relevante lo encontramos en la siguiente afirmación: “En la regulación del contrato de trabajo se parte de la estimación de su duración indefinida como regla general”. Especificando: “Tan sólo en los supuestos que específicamente se detalla, el contrato tendrá una duración determinada, reforzándose con esta y otras medidas que se articulan el principio de estabilidad en el empleo en previsión, asimismo, de fraudes y otros abusos en perjuicio del trabajador”. Aquí radica la principal y más importante novedad de la LRL. Lo que tiene su traslación en el artículo 14 de la siguiente forma: “El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las indicadas en el artículo siguiente”. Se daba así por concluida toda una etapa del Derecho del Trabajo desde la LCT⁶⁶.

Si la *voluntad* del legislador en este campo es clara y definida, en cambio, se ha achacado a la LRL una excesiva *rigidez* –he aquí el argumento/pretexto de marras– en lo referente a la contratación temporal. Cuando se procede a leer el artículo 15 de la LRL, sin embargo, no pocos matices pueden advertirse. El principal, que en ese mismo artículo se establecen no pocas posibilidades contratación. Otra cuestión radicalmente diferente es que en un contexto de ofensiva ideológica y política pro-flexibilidad comenzará a interpretarse cualquier tipo de medida de cierto “control” como rígida o directamente insuficiente.

Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea, nº 8, (1995), pp. 247-276. E igualmente, el artículo aparecido en *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, con el título de, “El movimiento obrero en Madrid: los metalúrgicos”, nº 3, (1965), pp. 97-102. Y, por último, BABIANO, José y MINGO, José Antonio de, “De la comisión de enlaces y jurados del metal a la Unión Sindical de Madrid: las comisiones obreras madrileñas durante el franquismo” en RUIZ, David (Dir.), *Historia de Comisiones...*, op.cit., pp. 191-214.

⁶⁵ No terminaban ahí las novedades ni los elementos *reformistas* o inclusive *progresistas*. Así por ejemplo, se establecía la creación del futuro FOGASA –denominado entonces como ‘Fondo Nacional Interempresarial de Garantía Salarial’–; se avanzaba muy considerablemente –como se ha indicado– en el principio de igualdad a través de la importante “Sección IV. Trabajo de la mujer”; o, por ejemplo, se prohibía taxativamente las Empresas de Trabajo Temporal y/o la subcontratación (artículo 19).

⁶⁶ En concreto, en el artículo 14 de la LRL se señalaba «el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las indicadas en el artículo siguiente». En este sentido la jurisprudencia al respecto y la influencia de la Ley italiana 230/1962, tal como ha señalado Raquel Aguilera, justificaron la opción de la preferencia por la contratación indefinida, ya que «para la Ley de Relaciones Laborales, por tanto, el contrato indefinido era la regla y los contratos temporales eran excepciones a dicha regla general que sólo podían concertarse cuando la naturaleza del trabajo objeto de la relación contractual fuera temporal». AGUILERA IZQUIERDO, Raquel, “El principio de «causalidad» en la contratación temporal”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 33, (2001), p. 100.

¿Qué nos dice el artículo 15? Pues en concreto, lo que establece es una contratación temporal causal. O dicho con otras palabras, sólo se podría emplear este tipo de contratación para los trabajos temporales en sentido estricto. En principio *pura y dura* lógica. Así en el *punto a* del artículo 15 se advertía: “Cuando se contrate al trabajador para la realización de obra o servicio determinados”. Ahora bien, las limitaciones vendrían dadas, en un primer lugar, por la siguiente circunstancia: “Si el trabajo excediera de un período de tiempo superior a dos años, el trabajador, al finalizar el contrato tendrá derecho a una indemnización que no será inferior al importe de un mes de salario real por cada año o fracción superior a un semestre”. Una cláusula que estaría presente en no pocas disposiciones aprobadas durante los siguientes años, y que sería leída por la patronal como todo un obstáculo. Observe –y no es esta una cuestión baladí– de que no se establece ni un límite mínimo ni un límite máximo al respecto. Es decir, estamos ante una normativa *bastante flexible* si el texto se lee sin anteojeras ideológicas de cualquier signo. Pero, a su vez, no se terminaban ahí las posibilidades de la contratación temporal. Junto a los supuestos de reserva de trabajo u otros de tipo similar, también se establecía en el artículo 15b) la siguiente disposición: “Cuando se trata de trabajos eventuales, considerando como tales lo que no tengan carácter normal y permanente en la empresa, fijándose la duración máxima en las Ordenanzas laborales”. He aquí otra clara ventana a la flexibilidad.

En aquella ambiciosa LRL también se dejaba ya entrever el armazón teórico-normativo de lo que serían las futuras políticas de fomento del empleo (art. 13). Con más dudas que certezas se encomendaba para el futuro inmediato el desarrollo de las medidas necesarias “previo informe de la Organización Sindical” de cara a “facilitar la contratación y empleo efectivo de los trabajadores de más de cuarenta años, de los de capacidad laboral disminuida, de los que tengan a su cargo especiales responsabilidades familiares o de los jóvenes trabajadores que accedan a su primer empleo”. Por más que *chirriara* la referencia a la “Organización Sindical” –todo sea dicho– el esfuerzo legislativo era considerable. Por un lado, ya se catalogaban posibles y potenciales colectivos especiales para los cuales se pensaban desarrollar “normas sobre reservas de puestos de trabajo y regímenes de jornadas reducidas adoptando”, a lo que sumaría un conjunto de bonificaciones a la Seguridad Social en empresas de mayores de 25 trabajadores. Eso sí, con una característica tan típica de este tiempo de incesante actividad normativa. Pues a pesar de estar contenidas estas disposiciones en la LRL no llegarían a funcionar al no desarrollarse reglamentariamente.

Igualmente también se esbozarían las líneas maestras de los futuros contratos en prácticas y en formación. Concretamente en la “Sección III. *Del trabajo en prácticas, la promoción y la formación profesional permanente*” en el artículo 8 y en el artículo 9, respectivamente⁶⁷. Un pequeño-gran salto adelante que superaban muchas de las reminiscencias gremiales de la LCT. Dejando por escrito unas escasas condiciones de uso –tan sólo, por ejemplo, se hablaba que no podía superar los 12 meses de duración– en todo caso el *carácter garantista* en torno a la figura del joven trabajador se hacía presente, de cara a evitar un posible mal uso por parte de los empleadores. Como en otros tantos casos aquel conjunto de buenas intenciones se quedarían en eso, en simple *buenas intenciones* al no desarrollarse reglamentariamente tales artículos.

Es, justamente, en relación al despido, tanto individual como colectivo, en donde más patente se hace la *rigidez* tantas veces esgrimida. Así en el artículo 18⁶⁸ –y en menor medida en

⁶⁷ En la disposición adicional primera se podía leer lo siguiente: «La implantación de la edad de dieciséis años para la admisión al trabajo se realizará, gradualmente, por el Gobierno, en coordinación con la entrada en vigor de la Ley General de Educación y su desarrollo en materia de Formación Profesional». Ley 16/1976, de 8 de abril, *de Relaciones Laborales*.

⁶⁸ «Artículo 18.1. La suspensión, y, en su caso, la extinción de las relaciones individuales de trabajo fundadas en causas tecnológicas o económicas, así como las modificaciones sustanciales de su contenido, requerirán la previa autorización del Ministerio de Trabajo, precedida del trámite legal que proceda, en el que se recabará siempre el informe previo de la Organización Sindical y del Jurado de Empresa o de los Enlaces sindicales cuando no exista *Jurado*. Al tiempo de solicitarse tal autorización, o

el artículo 21⁶⁹— se establecen todo un conjunto de requisitos administrativos que, de hecho, dificultarían en lo teórico la posible extinción del trabajo. Normativa relativa a los mecanismos de salida que se protegen todavía más con el artículo 34 y el artículo 35, objeto de las iras empresarios españoles en muy poco tiempo y que, en breve, obtendría la respuesta de la Administración⁷⁰. Pero como ya se ha recalcado una cuestión era la teoría y otra la realidad como evidenció el altísimo nivel de destrucción de puestos de trabajo en los siguientes años. Entre otras razones ya que las causas de despido establecían tales posibilidades que, en realidad, se estaba ante un *despido libre* pero no gratuito.

Nos encontramos, por tanto, con una *Ley* que como dirá Miguel Rodríguez-Piñero, “pese al momento histórico en que se produce, es más reflejo del régimen político que está acabando, que expresión de las transformaciones que el Derecho del Trabajo sufre ante las exigencias del ya emergente sistema democrático”⁷¹. Así pues, y al igual que sucede en el campo de lo económico, en el laboral se va a reaccionar tarde y mal la crisis. No sin suficientes dosis de razón no pocos autores, han venido hablando en relación al mantenimiento de la preferencia de la contratación indefinida, de que tal decisión conllevó “preceptos demagógicos de no pequeño alcance”⁷². O directamente que se trató de la expresión del más puro “populismo legislativo”⁷³. Todo ello con una nota a considerar: “Este nuevo sistema fue insensible a la situación de crisis económica, que exigía, como ocurrió en otros países, una mayor flexibilidad cuantitativa”⁷⁴.

en cualquier momento de su tramitación, la empresa podría formular propuesta de indemnización para los supuestos correspondientes, en cuyo caso la autoridad laboral, al resolver, podrá aceptar dicha propuesta siempre que resulte superior al máximo previsto en la Ley de Procedimiento Laboral, si no se fijase indemnización o la cuantía de ésta fuera recurrida, corresponderá a la Magistratura de Trabajo su determinación con arreglo a la citada norma y a la presente Ley». Ley 16/1976, de 8 de abril, *de Relaciones Laborales*.

⁶⁹ «Artículo 20. La imposibilidad de trabajar en la empresa sobrevenida como consecuencia de fuerza mayor, reconocida por la autoridad laboral, mediante expediente de regulación de empleo, constituye causa de extinción, en su caso, de suspensión de la relación de trabajo. La concurrencia de esta causa podrá exonerar al empresario del abono de los salarios correspondientes al período de tramitación de dicho expediente, a partir de la fecha y con el alcance que se fijen en la resolución administrativa, así como de las indemnizaciones por despido o suspensión, sin perjuicio de la protección que corresponda a los trabajadores en el régimen de desempleo». Ley 16/1976, de 8 de abril, *de Relaciones Laborales*.

⁷⁰ «34.1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de las empresas, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezca en las disposiciones legales de carácter general, en cada Ordenanza Laboral o en el Convenio Colectivo que sea aplicable». «Artículo 35. 1. Cuando en un procedimiento por despido, el Magisterio de Trabajo considera que no hay causa justa para el mismo, en la sentencia que así lo declare condenará a la Empresa a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquel, así como al pago del importante del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar. 2. Si la causa alegada por la Empresa para el despido, si bien no es suficiente para tal sanción, mereciera otra de menor entidad, por ser constitutiva de falta grave o leve, el Magisterio determinará en la sentencia la sanción adecuada a la falta cometida, a fin de que, en su caso, pueda ser impuesta por el empresario, sin perjuicio de condenar a la empresa a la readmisión y al pago de las indemnizaciones complementarias, conforme establece el párrafo anterior». Ley 16/1976, de 8 de abril, *de Relaciones Laborales*.

⁷¹ RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “La Ley de Relaciones..., *op.cit.*, p. 27.

⁷² DIÉGUEZ CUERVO, Gonzalo, “Estabilidad en el empleo y contrato temporales”, *Civitas*, nº 2, (1980), p. 185.

⁷³ VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Política de empleo y protección del desempleo en España: datos para una evaluación”, *Documentación Laboral*, nº 6, (1982), p. 29.

⁷⁴ FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal...*, *op.cit.*, p. 50. Un estado de la cuestión sobre este tema en, MONTROYA MELGAR, Alfredo, “La estabilidad en el empleo: recuperación de un principio”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 33, (2001), pp. 61-73.

A partir de este punto de partida base, la “ofensiva flexibilizadora” lo dominará todo en el terreno de las relaciones laborales. Más aún cuando comienza a asentarse como la posición hegemónica en el terreno académico, en paralelo, a lo que acontecería en las facultades de ciencias económicas⁷⁵.

En el campo de los matices, de los detalles relevantes, debe también decirse que, al menos, en el campo teórico –o por lo menos en el epistemológico– durante estos años la ofensiva flexibilizadora, se guiará, según sus propios defensores, por la necesidad de crear empleo en primer lugar⁷⁶. Lo que puede resultar lógico a simple vista no lo es tanto. Señalamos este “pequeño-gran” matiz por la sencilla razón de que una vez avanzada la década de los ochenta, este principio pasará a ser considerado de segundo orden. Como examinaremos el gran argumento justificativo de la flexibilización del marco laboral, será el de asegurar, en primer lugar, el crecimiento económico, enlazando de esta forma con las pautas intrínsecas de la lógica de la modernización socialista. No se trata de un giro menor si se tiene presente el pasado reciente de las legislaciones europeas, pues surge una nueva asociación discursiva-ideológica nada inocente, que va a venir a vincular,

«el bienestar de los trabajadores con la eficiencia económica, entendiendo que el primero será el resultado natural del buen funcionamiento del sistema económico, y por ende, del buen funcionamiento y de la rentabilidad de las empresas que en él opera»⁷⁷.

Prácticamente, en paralelo al ritmo del progresivo empeoramiento de la crisis económica y de sus negativos resultados –mensuales o trimestrales– en relación a las tasas de desempleo, darían inicio las modificaciones de la LRL. Todo ello a los escasos meses de su publicación en el BOE. En cierta medida, el argumento de la *crisis* se convertiría, por su parte, en el motor de la ampliación de la contratación temporal. *Crisis*, recordemos, *coyuntural*, según los cánones interpretativos de aquellos momentos.

Por la vía rápida, a través de un RD-L⁷⁸, el segundo Gobierno de la Monarquía entonces presidido por Adolfo Suárez (julio 1976-julio 1977) con Eduardo Carriles Galarraga como Ministro de Economía (julio 1976-julio 1977) y Álvaro Rengifo como Ministro de Trabajo (julio 1976-julio 1977)– hombres de perfiles técnicos antes que políticos propiamente dichos– se aprobaría Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, *sobre medidas económicas* a los dos escasos meses de llegar al Ejecutivo⁷⁹. Una medida que sería muy duramente criticada por las fuerzas sindicales democráticas y que a su vez constituiría el primer gran aviso flexibilizador.

En una situación económica claramente regresiva –con tasas de inflación desconocidas, tal y como se reconoce en la propia *Exposición de Motivos*⁸⁰– también en la citada normativa se

⁷⁵ Nos remitimos aquí al apartado “6.1. Las condiciones objetivas vs subjetivas del trance modernizador”.

⁷⁶ Véase el apartado “12.4. El «gran salto adelante». El desarrollo legislativo de la RET’84: examen de las bases político-institucionales y de los mecanismos jurídicos de la formación histórica de la «cultura empresarial de la precariedad»”.

⁷⁷ RODRÍGUEZ-PÍÑERO, Miguel, “La Ley de Relaciones..., *op.cit.*, p. 31.

⁷⁸ Esta figura contemplada en nuestro ordenamiento depende exclusivamente del poder Ejecutivo, quien tan sólo puede hacer uso de ella en casos de extrema necesidad y urgencia. En el caso de España tiene ser que ser ratificada por el Congreso de Diputados. Con una especificidad: no se ratifica el Real Decreto-Ley sino la situación de emergencia. En situaciones democráticas es empleada tal figura para acelerar decisiones y evitar el trámite parlamentario.

⁷⁹ Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, *sobre medidas económicas* [B.O.E. el 11 de octubre de 1976].

⁸⁰ Su primer párrafo es altamente relevador: «La situación de la economía española aconseja la adaptación de un conjunto de medidas complementarias que alcancen el objetivo primordial de reducir la inflación sin incidir negativamente en la reactivación económica». Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, *sobre medidas económicas*.

aludiría a la necesidad de avanzar hacia una estabilidad política, de cara lo que “necesita y a la que aspira el pueblo español”; por esta misma senda, se van a introducir un conjunto de elementos que alteraran, en menos tiempo de lo pensado, los parámetros de la negociación colectiva –“en los Convenios Colectivos no podrá pactarse reducción del tiempo de trabajo efectivo” (artículo 5.2)– la política de rentas –vía congelación salarial (artículo 5.4.)– así como la contratación temporal y el despido mediante una reducción considerable de las garantías del trabajador a través de una nueva redacción del artículo 34 y del artículo 35 de la LRL⁸¹.

No puede perderse de vista estos dos últimos artículos. He aquí el antecedente de lo que, en breve, se transformarán en lo que aquí hemos denominado como los “regalos empresariales” de la UCD, al eliminar casi totalmente los márgenes protectores –legales y jurídicos– en relación al despido.

Todas estas medidas con una vigencia entre octubre de 1976 a junio de 1977 –he aquí un primer fundado ejemplo de la corta duración de este tipo de medidas legislativas– tienen una clara dirección: un paso cualitativo en la flexibilización del ordenamiento laboral. Una dirección que se puede visualizar a través de la lectura de su artículo 11:

«Las empresas podrán contratar, hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y siete, a personas en situación de desempleo o que accedan a su primer empleo, con carácter eventual, por plazo no superior a seis meses, cualquier que sea la naturaleza del trabajo a que hayan de adscribirse».

Barra libre por tanto para la contratación temporal a pocos menos de seis meses de aprobarse la LRL. No sólo se elimina la causa –la causalidad, en términos estrictamente jurídicos– sino que, además, se universaliza, en la práctica, esta figura para todos los trabajadores, aunque la misma establece una limitación de uso temporal harto considerable. ¿Por qué? Nos encontramos en un momento histórico en donde los márgenes de actuación política, no pueden concretarse a medio o largo plazo sino a corto, ante la situación de palpable debilidad política del segundo Gobierno de la Monarquía.

Hasta el siguiente capítulo de la historia contratación temporal –los “Pactos de la Moncloa” y la importante normativa que le siguen de inmediato– se producen toda una serie de acontecimientos de no poca relevancia en el acontecer histórico del último tercio del siglo XX español. De tal forma que, en términos históricos, entre octubre de 1976 a octubre de 1977, se puede hablar de una aceleración de los tiempos políticos. Veamos, pues, que sucede.

La primera nota a considerar –obvia pero obligada de advertir– es que la firma de los Acuerdos o Pactos de la Moncloa se produce una vez constituidas las que serían, a la postre, las Cortes *constituyentes*, tras las elecciones legislativas del miércoles 15 de junio de 1977. Pero hasta llegar a esas mismas fechas, primero, se ha de retroceder al referéndum del 15 de diciembre de 1976 para la *reforma política* –aprobado por una inmensa mayoría de más del 94%–⁸². Una votación, por cierta, celebrada sólo dos meses después de publicarse RD-L 18/1976.

Como veremos y examinaremos de aquí hasta el final del presente trabajo, la historia mayoritaria –oficial y/o dominante– ha tendido de forma general a obviar –consciente o inconscientemente– con inusitada “alegría” la presión de calle una vez constituidas aquellas Cortes. Hasta tal punto se ha llegado que sucesos de una enorme importancia histórica o de una gravedad social más que considerable, no sólo han sido obviados sino directamente silenciados. No faltan los ejemplos. Son los *antecedentes olvidados* del ET, y que en el mejor de los casos ha ido a parar alguna nota a pie de página.

⁸¹ Estos mismos artículos serían derogados unos meses después definitivamente a través, Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, *sobre Relaciones de Trabajo* [B.O.E. 9 de marzo de 1977]. Véase los citados artículos en la *nota 70*.

⁸² Ley 1/1977, de 4 de enero, *Ley para la Reforma Política* [B.O.E. 5 de enero de 1977].

Dicho todo lo anterior, el citado referéndum del 15 de junio estaría precedido por la convocatoria de una huelga general por parte de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) el 12 de noviembre de 1976⁸³. Aquel primer paro general tras la muerte del dictador, no sólo iría dirigido contra las evidentes limitaciones y insuficiencias del *proyecto de reforma política*, sino también contra las medidas de ajuste laboral y económico del segundo Gobierno de la Monarquía a través del RD-L 18/1976. A pesar de que la *amnistía* era con mucho la primera demanda política de la oposición⁸⁴, como nos recuerda el profesor José María Marín Arce la denuncia por parte de la COS de la falta de avances, o cuando menos retrasar la *reforma sindical*, por parte del Gabinete de Suárez, actuaría como motor para la convocatoria de la jornada del 12 de noviembre. Ello a pesar de la propia debilidad de la COS, que conformada a *trancas y barrancas* no deja de constituir el primer y más firme intento de unidad sindical a nivel estatal durante todo el siglo XX español. En cualquier caso,

«[L]a chispa que encendió los ánimos de los sindicatos fueron las medidas económicas por el Consejo de Ministros de 8 de octubre de 1976 y muy especialmente la suspensión del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales. Ante esta segunda agresión, los sindicatos convocaron una *jornada de paro general para el 12 de noviembre de 1976* a través de la COS»⁸⁵.

La huelga sería importante en lo cuantitativo –entre los 2 millones de convocantes según las fuerzas sindicales a no más de medio millón según el Gobierno, todo ello en medio de una fuerte represión y control policial– pero también en lo cualitativo. Al igual que sucedería en la Jornada de Reconciliación Nacional y en la Huelga Nacional Pacífica durante 1958 y 1959, respectivamente, el *paro general* del 12 de noviembre no conseguiría la pretendida ruptura democrática⁸⁶. Con todo aquel movimiento huelguístico llegaría a constituirse en un importante desafío frente a los residuos del régimen franquista, más tras lo que había sucedido en el primer trimestre de 1976⁸⁷. Y, a su vez, aquel movimiento dejaría bien claro que el movimiento obrero democrático se mostraría, en adelante, totalmente beligerante contra cualquier modificación de la normativa de entrada o salida del mercado de trabajo.

De esta forma, la citada modificación del artículo 34 y del artículo 35 de la LRL pondría fin al *último sueño paternalista-reformista* del franquismo, para ser totalmente derogados unos meses después. No tardaría en llegar la rápida y oportuna nueva redacción del artículo 35 de la LRL⁸⁸ a través del artículo 10 de la RD-L 18/1976⁸⁹. O dicho con otras palabras: se avanzaba

⁸³ Véase lo apuntado en la *nota* 6.

⁸⁴ Todas estas cuestiones han sido tratadas en el apartado “4.2.1. La consolidación de una *nueva coalición de poder* (1972-1977)”.

⁸⁵ MARÍN ARCE, José M^a, “La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS): una experiencia de unidad de acción sindical durante la transición”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea*, nº 9, (1996), p. 301. Asimismo llegaría a señalar el citado historiador: «Desde luego, la movilización del 12 de noviembre no se convirtió en la tan esperada huelga general que debía servir para imponer la ruptura, pero sí fue la jornada de lucha más importante que conoció el país en los últimos cuarenta años». *Ibidem*, p. 302.

⁸⁶ Junto con lo apuntado en la *nota* 6, en primer término véase, ERICE, Francisco, “Los condicionamientos del «giro táctico» en 1956: El contexto de la Política de Reconciliación Nacional” en BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coords.), *Estrategias de alianza...*, *op.cit.*. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Jesús, *Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982)*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004, y dentro de ahí, “La política de reconciliación nacional” (pp. 19-63); YSÀS, Pere, “Huelga laboral y huelga política. España 1939-75” en BONAMUSA, Francesc (ed.), *La Huelga General...*, *op.cit.*. Y de forma específica: TREGLIA, Emanuele, “El PCE y la huelga general (1958-1967)”, *Espacio, tiempo y forma. Serie V. Historia Contemporánea*, nº 20, (2008), pp. 249-263; y, HERNÁNDEZ, Félix, “La jornada de reconciliación nacional del 5 de mayo de 1978”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea*, nº 20, (2008), pp. 281-293.

⁸⁷ Nos remitimos a lo acotado en la *nota* 60.

⁸⁸ Véase lo apuntado en la *nota* 70.

decididamente hacia el despido libre y por poco gratuito. A pesar de presentarse tales medidas como temporales –hasta 30 de septiembre de 1977– las mismas tomarían un cariz definitivo en muy poco tiempo. De hecho, tampoco serían aquellas las únicas medidas como se advirtió. Otras tantas disposiciones vaciarían de contenido protector la LRL. Las *iras patronales* contra el paternalismo legislativo contenido en no pocos artículos de la LRL –precisamente, una crítica procedente de quien más se había beneficiado del paternalismo franquista– no tardarían en hacer mella en los débiles gobiernos presidido por el propio Suárez.

Aunque no se puede negar, en ningún caso, la creciente *sensibilidad democrática* de aquellos gobiernos, con las mismas ha de destacarse su muy *escasa sensibilidad social*. Haciendo caso omiso a las reivindicaciones que habían conducido al paro general del 12 de diciembre de 1976, aquel mismo Ejecutivo –ya entonces, en cierta parte, consolidado– acentuaría su ofensiva liberal a los cinco meses. En pleno desmontaje del franquismo vertical –recuérdese la importancia de la Ley 19/1977 del mes de abril– se vendría a aprobar el también Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, *sobre Relaciones de Trabajo*⁹⁰. Aunque no se toca, en esta ocasión, la contratación temporal establecida en la LRL ni en el RD-L 18/1976 –a pesar de que para esa fecha su artículo 11 expiraba su mandato en otra muestra de claro desorden normativo– se va a venir a regular, entre otras cuestiones, el Derecho a la Huelga (Título I. Capítulo I. Artículo 1-Artículo 12) –que, en la práctica, ha quedado así establecido hasta nuestro presente histórico vivo– o los propios Convenios Colectivos de trabajo (Título II. Conflictos colectivos de Trabajo. Artículo 17-Artículo 26), entre otras muchas cuestiones.

De este modo, se avanza en dos grandes direcciones: la liberalización política y la liberación económica. Muestra de lo primero sería la propia *Exposición de motivos*. Ahora ya sí de claro contenido pre-democratizador, aunque también con un claro contenido *de clase*:

«La regulación de las relaciones de trabajo en nuestro Derecho Vigente, responde a una concepción política intervencionista que, evidentemente, ha propiciado toda una larga de etapa de importantes avances sociales. El nuevo marco político hacia el que aceleradamente discurre la Nación, aconseja una profunda reforma normativa, inspirada en el principio de liberalización de las relaciones de trabajo, en consonancia con los sistemas jurídicos imperantes en los países de la Europa Occidental de nuestro mismo contexto cultural».

También aquí, a través del RD-L 17/1977, el legislador dejaría bien claro como tal normativa no pretendía convertirse en un Código o en un Estatuto, pero tampoco andaba lejos de tal consideración en términos generales. De hecho hacía referencia a la Disposición Final Segunda de la LRL⁹¹ en su propia Disposición Final Tercera en un claro intento de ganar tiempo político de cara al definitivo *salto democratizador* en el mundo del trabajo⁹². Otro claro síntoma

⁸⁹ «Artículo 10.1. Desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley y hasta el treinta de septiembre de mil novecientos setenta y siete queda en suspenso la aplicación del artículo treinta y cinco de la Ley dieciséis mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril, de Relaciones Laborales, sustituyéndose, durante el expresado periodo, por la norma siguiente». Concluyendo aquel largo artículo con la siguiente frase: «Artículo 10.3. Se autoriza al Ministerio de Trabajo para que, mediante Orden ministerial, dicte las normas adjetivas aplicables a los indicados procesos». Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, *sobre medidas económicas*.

⁹⁰ Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, *sobre Relaciones de Trabajo*.

⁹¹ «La duración máxima de la semana de trabajo establecida en esta Ley podrá ser objeto de reducción progresiva por el Gobierno, con alcance general, en una o varias veces, y con ampliación también del período mínimo de descanso semanal y de las vacaciones laborales, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, de acuerdo con la situación social y económica y del país. Durante el período de un año siguiente a los posibles acuerdos del Gobierno en esta materia, las Empresas podrán mantener la duración máxima de trabajo anteriormente en vigor, pero las horas que se sigan trabajando por encima del número máximo nuevo que se aplaza se abonarán con el carácter de extraordinarias». Ley 16/1977, de 8 de abril, *de Relaciones Laborales*.

⁹² «Disposición final tercera. Se prórroga hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho la aprobación por el Gobierno del texto refundido a que se refiere la disposición final

de lo anterior es que ya no se nombraba a la Organización Sindical en vías de desmontaje por aquel entonces.

A su vez esta normativa –implementada por la *vía de urgencia* una vez más– va a prestar una enorme atención –de hecho, ocupa la mayor parte del citado RD-L– a la cuestión del despido. De esta forma, en el Título V –Artículo 30-Artículo 44– y en el Título VI –Artículo 45– van a reestructurar profundamente las condiciones del despido y de la reestructuración de plantillas, respectivamente. ¿En qué dirección? En la antes apuntada. A saber, en la profundización en el incremento de las posibilidades del despido. Ahora bien, la antes citada *falta de sensibilidad social* –o mejor dicho socio-laboral– del segundo Gobierno de la Monarquía no va a ser obstáculo para el mantenimiento de un pragmatismo de cara a evitar nuevos conflictos y movilizaciones, que pudieran todavía más desestabilizar la precaria situación política. Así en la propia *Exposición de motivos* se argumentaría que tal normativa es un intento de adaptación a los criterios de la OIT y de la CEE al respecto, dejando muy claro, en cualquier caso, como la “nueva regulación del despido consagra, en todo caso el carácter causal del mismo, con rechazo, por tanto, del despido libre”.

En el artículo 31.1 se señala textualmente: “Solamente podrá tener lugar el despido cuando exista causa relacionada con la conducta del trabajo o con circunstancias objetivas derivadas de la capacidad profesional del mismo o de necesidades de funcionamiento de la Empresa”. Es precisamente, la última parte de este articulado la que evidencia la dirección ya apuntada con respecto a la consagración del “despido libre objetivo”. Pese a todo, el *espíritu democratizador* de la normativa es claro en su artículo 32:

«En ningún caso la consideración de causa justa para el despido las siguientes:

- a) La pertenencia a una asociación sindical o la participación en las actividades legales de la misma.
- b) Ostentar la condición de representante de los trabajadores, o la actuación en dicha calidad, dentro de lo establecido en el ordenamiento jurídico.
- c) La presentación de quejas o intervención en procedimiento seguidos frente al empresario por supuesto incumplimiento por éste de normas laborales o de Seguridad Social.
- d) La raza, color, sexo, estado matrimonial, religión, opinión política u origen social».

La diferencia entre la LRL y el RD-L 17/1977 son, simplemente, abismales. Constituye, de hecho, el paso de una normativa franquista a una pre-constitucional. También con aquella disposición, se perseguirá una rápida adaptación a la situación de emergencia económica. La tensión entre el espíritu reformista-garantista y las mayores facilidades objetivas y subjetivas para el despido es evidente –por ejemplo véanse el artículo 39 o el artículo 45–. A lo que se suma una considerable reducción de las indemnizaciones (artículo 37). Por si cabían dudas del citado *espíritu* en la Disposición final primera se deroga, entre otros, el artículo 35 de la LRL y el artículo 10 del RD-L 18/1976⁹³. Al anterior regalo empresarial de la UCD ahora se le pone todavía un mayor *lazo rojo* de presentación.

Como una *certeza* antes que *hipótesis de trabajo* propiamente dicha, la profesora Carmen Molinero advertiría hace tiempo de un rasgo harto singular compartido socialmente a través de nuestra memoria social colectiva al respecto de este tiempo. Una *certeza* que venía a señalar como se tiende a pensar como tras el fallecimiento de Franco la democracia hubiera

segunda de la Ley dieciocho/mil setenta y seis, de ocho de abril, de Relaciones Laborales, pudiéndose efectuar tal refundición en uno o varios textos, con las correcciones técnicas adecuadas, en las que habrán de incluirse las modificaciones establecidas en el presente Real Decreto-Ley». Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, *sobre Relaciones de Trabajo*.

⁹³ «Disposición final primera. Quedan derogados el Decreto-Ley cinco/mil novecientos setenta y cinco, de veintidós de mayo, sobre regulación de los Conflictos Colectivos de Trabajo; el artículo setenta y siete de la Ley de Contrato de Trabajo; el artículo diez del Real Decreto-Ley dieciocho/mil novecientos setenta y seis, del ocho de octubre, sobre Medidas Económicas; el artículo treinta y cinco de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta y seis de ocho de abril, de Relaciones Laborales, y cuantas Leyes y disposiciones se apongán a lo establecido en este Real Decreto-Ley». Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, *sobre Relaciones de Trabajo*.

venido rodada por sí sola⁹⁴. Una *idea-fuerza* que todavía ha cobrado más entidad cuando se hace referencia al segundo Gobierno de la Monarquía. Buena parte de la *culpa* de la construcción de estas imágenes estereotipadas la tienen aquellos relatos edulcorados y acrílicos de los años ochenta y noventa que construyeron el “modelo canónico de la transición” con todos los beneplácitos y apoyos imaginables y no imaginables⁹⁵.

La realidad histórica de aquel tiempo dista de ser así. En primer lugar, por la propia prolongación del *Estado de excepción permanente* –del que siempre ha hablado el ex-fiscal Carlos Jiménez Villarejo⁹⁶– que había caracterizado al franquismo y que conservaría toda su fuerza durante la segunda mitad de los años setenta. Ahí está, por ejemplo, la aprobación del Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, *sobre prevención de terrorismo* durante el Gobierno de Arias, estando vigente durante el Gobierno de Suárez y prologándose en el tiempo hasta enero de 1979 tras no pocos recortes normativos⁹⁷. Un Decreto-Ley que, en la práctica, permitía detener por cualquier tipo de “delito” considerado así por la policía política o el aparato judicial del régimen.

Tal y como se vio en el Capítulo 4, la represión policial por parte del TOP seguiría constituyendo una dura realidad hasta su desaparición en enero de 1977 con la publicación del Real Decreto-Ley 1/1977, de 4 de enero, *por el que se crea la Audiencia Nacional*⁹⁸. No es que aquello terminara, de inmediato, con la represión. Pero sí constituiría un paso político y simbólico a valorar oportunamente. Con todo, la represión y control político y social continuaría contra el movimiento obrero hasta, prácticamente, el final del mandato de la UCD, a través y por los *restos* de la antigua Brigada Política-Social encargada de estas tareas⁹⁹. Todo ello, a través de unas muy cuestionables –desde la perspectiva del actual Derecho del Trabajo– “vías legales”. Así pues, la represión contra la oposición política pero muy particularmente contra el movimientos sindical hasta principios de los años, es un factor que no debe minusvalorarse en ningún caso. Por cierto, hablando de *delitos* todavía seguía existiendo en el Código Penal franquista la figura de los “delincuentes políticos” con o sin Gobiernos de la Monarquía¹⁰⁰.

A la hora de hablar de la represión también se ha de tener muy presente la violencia política que acompañó a este proceso de cambio social y político. Una violencia política que entre 1975 y 1982 que se llevaría por delante la muerte de más de 600 personas, y que no sólo cabe atribuírsela a ETA como ha sido regla general; sino también a los cuerpos de seguridad, a los cuerpos paramilitares, los servicios secretos o los grupos de extrema derecha¹⁰¹. La *matanza de Atocha* un 24 de enero de 1977 se constituiría en el mejor ejemplo de la potencialidad del

⁹⁴ Véase lo apuntado en Capítulo 3, *nota* 283.

⁹⁵ GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Presentación. La «memoria democrática» como conflicto” en id. (coord.), *La memoria como...*, *op.cit.*.

⁹⁶ Véase lo apuntado en Capítulo 3, *nota* 288.

⁹⁷ Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, *sobre prevención del terrorismo* [B.O.E. 27 de agosto de 1975]. Al respecto, CASANELLAS, Pau, “Los últimos zarpazos del franquismo: el Decreto-Ley sobre prevención del terrorismo de agosto de 1975”, *Historia del Presente*, nº 12, (2008), pp. 155-172.

⁹⁸ Real Decreto-Ley 1/1977, de 4 de enero, *por el que se crea la Audiencia Nacional* [B.O.E. 5 de enero de 1977]. Véase asimismo lo apuntado en el apartado “4.2.2.1. Construcción de un socialismo para el poder político (1977-1979)” y en concreto las *nota* 80, *nota* 104 y *nota* 181, entre otras.

⁹⁹ Véase lo apuntado en *nota* 415.

¹⁰⁰ Sobre la figura del ‘delincuente político’, véase el análisis al respecto de: GARCÍA VALDÉS, Carlos, *El delito político*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976; así como el trabajo de, LANDROVE, Gerardo, *La amnistía en España*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976, quien llegaría a señalar como en la «[ley española] no se precisa el concepto legal de delito político, aunque el legislador se refiera a móviles de esta naturaleza», p. 22. Y finalmente consúltense las tesis manejadas años más tarde por, SOBREMONTÉ, José Enrique, *Indultos y amnistía...*, *op.cit.*.

¹⁰¹ Véase lo apuntado en la *nota* 60.

entonces movimiento obrero y la necesidad de frenar su creciente poder, a costa de sangre y de extender la estrategia del miedo y del terror a nivel social¹⁰².

Mientras tanto, la oposición antifranquista –de procedencia mayoritariamente comunista para más señas– no dejaría las calles ni las movilizaciones en una espiral conflictiva, que ayudaría a reequilibrar la composición de fuerzas hasta llegarse a un muy teórico equilibrio. Si bien no se puede negar la potencialidad histórica de este movimiento obrero y de las acciones del Partido Comunista de España, el paso de la *ruptura* a la *reforma pactada*, junto con las pobres condiciones en que se pudieron presentar los partidos políticos antifranquistas –que así lo quisieron– a las elecciones del 15 de junio, debilitarían profundamente ese *falso equilibrio* de correlación de fuerzas que nunca llegaría a ser tal.

Los propios resultados de las elecciones se constituyeron en una muestra del deseo mayoritario de seguir avanzando en la construcción del naciente sistema democrático, pero a su vez de la propia *debilidad intrínseca* de la oposición, quien tras más de cuarenta años en la clandestinidad llegaría a donde llegaría. A lo que se sumarían no pocos errores a la hora afrontar aquella realidad.

Garantizado el apoyo electoral –aunque no tanto social– el primer Gobierno democrático de Suárez, no se tardaría en poner en marcha la operación de los Pactos de la Moncloa. En paralelo, a este proceso económico se iniciaría otro: las negociaciones y trámites parlamentarios de la Ley de Amnistía. Desde la proclamación de Juan Carlos I no habían faltado los indultos, las amnistías parciales e inclusive la extraña figura del extrañamiento con indulto –tan singular como única del “modelo español de impunidad”– que, poco a poco, irían vaciando las cárceles democráticas. Sin embargo, si una reclamación generaría un apoyo homogéneo en las filas del antifranquismo, esta sería la amnistía total tal y como se ha avanzado en más de una ocasión¹⁰³. Tras no pocas negociaciones, conspiraciones y rupturas parciales y totales del proceso negociador, la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de *Amnistía* se publicaría en el BOE el lunes 17 de octubre. Una siempre recordada y citada *Ley* que en su artículo 5 señalaba:

«Están comprendidas en esta Ley las infracciones de naturaleza laboral y sindical consistentes en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores en normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad»¹⁰⁴.

He aquí el segundo gran hito de la democratización del SERL –la *amnistía laboral*– junto con la legalización de los sindicatos en abril de 1977. Un *hito* que forma parte de las conquistas del movimiento obrero de clase. Una conquista que no sería sencilla y que como

¹⁰² En primer lugar, véase: RUIZ-HUERTA, Alejandro, *La memoria incómoda: los abogados de Atocha*, 2ª ed., Burgos, Dossoles, 2002. De interés resultó en su día el reportaje firmado por, MALVAR, Aníbal, “¿Qué fue de los asesinos de Atocha?”, *Crónicas. Suplemento dominical de El Mundo*, nº 327, (2002). Dos revisiones recientes al respecto, junto con la bibliografía comentada en otros capítulos en: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “El proceso de..., *op.cit.*”; SÁEZ VALCÁRCEL, Ramón, “Los jueces y el aprendizaje de la impunidad, a propósito de los crímenes del franquismo”, *Mientras Tanto*, nº 114, (2010), pp. 41-72.

¹⁰³ Consúltense las hipótesis de, AGUILAR, Paloma, “La amnesia y la memoria. Las movilizaciones por la amnistía en la transición a la democracia” en PÉREZ LEDESMA, Manuel y CRUZ, Rafael (eds.), *Cultura y movilización...*, *op.cit.*, pp. 327-357. E igualmente, véanse las tesis mantenidas en: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Presentación. La «memoria histórica» como conflicto” en id. (dir.), *La memoria como...*, *op.cit.*.

¹⁰⁴ Ley 46/1977, de 15 de octubre, de *Amnistía*. En términos generales véase: MOLINERO, Carme, “La Ley de Amnistía de 1977: la reivindicación antifranquista y su lectura treinta años después” en ESPUNY TOMÁS, Mª Jesús y PAZ TORRES, Olga (coords.), *30 años de...*, *op.cit.*, pp. 41-56. Estudios ya más específicos en: ALONSO OLEA, Manuel, “Jurisprudencia reciente sobre huelga y amnistía laboral”, *Civitas*, nº 1, (1980), pp. 95-100; y, VILLA Luis Enrique de la y DESDENTADO, Aurelio, *La amnistía laboral...*, *op.cit.* Sumado a lo apuntado en Capítulo 4, *nota* 76.

narró en su momento el abogado comunista Jaime Sartorius, gracias al citado 5 serían amnistiados más de 70.000 trabajadores¹⁰⁵.

Realizado el recorrido entre diciembre de 1976 a octubre de 1977, toca adentrarse en el tercer episodio de la historia de la contratación temporal. Aquí los *Pactos de la Moncloa* continuarían con la lógica seguida hasta entonces. No es que los mismos supusieran un *nuevo giro* definitivo en la progresiva liberalización, pero sí aportaron su “granito de arena” a la *causa*. Aun a riesgo de repetirnos, por parte del discurso hegemónico liberal no se ha dejado de insistir en su oportunidad, su necesidad o directamente su gran valía. La propia introducción de los *Pactos* así lo quiso dejar bien explicitado¹⁰⁶. Complicado es afirmar lo contrario.

Sin embargo, en pocas ocasiones se ha realizado el siguiente ejercicio: si bien nadie puede negar su trascendencia política así como su impacto en las macro-magnitudes económicas, empezando por el propio control de la inflación; en cambio, sus aspectos sociales – que a continuación detallaremos – apenas se llevarían a la práctica. Se inauguraba así una extendida práctica como tendremos la oportunidad de ver en más de una ocasión.

Con Enrique Fuentes Quintana como Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía (julio 1977-febrero 1978), Francisco Fernández Ordóñez como Ministro de Hacienda (julio 1976-abril 1979)¹⁰⁷, y con Manuel Jiménez de Parga como Ministro de Trabajo (julio 1977-febrero 1978), sumado a un conjunto de competentes técnicos en las diferentes Secretarías y Subsecretarías de Estado; Suárez a la salida de las elecciones tendría que afrontar la dura crisis económica de una forma firme y sin los titubeos anteriores. Una crisis que ya duraba cuatro años, y que tan sólo había empezado a mostrar sus signos más destructivos. Aunque la autoría de la propuesta de unos acuerdos políticos y económicos todavía es discutida, el objetivo primordial, además del estrictamente económico, era evidente: garantizar una cierta estabilidad política frente al continuo ruido de sables, en un momento en que cómo han reconocido los propios protagonistas todavía el Servicio de Información Militar seguía en manos de los militares sin apenas control por parte del Ejecutivo¹⁰⁸. En cualquier caso, la historia de su negociación es sobradamente conocida para detenernos en la misma.

¹⁰⁵ Entrevista con Jaime Sartorius realizada por Sergio GÁLVEZ BIESCA los días 16 y 21 de marzo de 2011 para el proyecto de investigación *Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista*, dirigido por Rubén Vega y José Gómez Alén. Entrevista depositada en el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Jaime Sartorius: en primera línea en la reconstrucción de la «lógica democrática»” en GÓMEZ ALÉN, José y VEGA, Rubén (coords.), *Materiales para el...*, *op.cit.*.

¹⁰⁶ «Una primera justificación evidente se encuentra en la importancia del acontecimiento como hecho político singular de nuestra historia y casi único en el mundo. Estos pactos recogen en sus textos el fruto de una negociación entre las fuerzas políticas españolas, que ha sido posible gracias a la madurez de dichos grupos y a la pericia con que fueron llevadas las conversaciones». No terminaba ahí la glosa en la introducción/prólogo sin título. No faltarían ni los *cantos patrióticos* ni lo que puede resultar más interesante a ojos del historiador: la auto-construcción hagiográfica de los mismos: «[Los Pactos de la Moncloa] sitúa [sus] documentos en una esfera que para la gran mayoría de los ciudadanos es la esfera de la curiosidad. No queremos decir con ello que la Historia se reduzca a ser una respuesta a nuestra curiosidad por el pasado. Puestos a matizar tendríamos que empezar a afirmar que toda la Historia es, en cierto modo, contemporánea, porque pervive en nuestro presente y configura nuestro futuro, y precisamente la intención de esta publicación es mirar hacia el presente y hacia el futuro». PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, *Los Pactos de la Moncloa. Texto completo del acuerdo económico y del acuerdo político*, 2ª ed., Madrid, Servicio Central de Publicaciones Secretaría General Técnica Presidencia del Gobierno, 1977, pp. 11-12.

¹⁰⁷ Nos remitimos aquí a la extensa y completa biografía de, DELGADO HERNÁNDEZ, Santiago y SÁNCHEZ MILLÁS, Pilar, *Francisco Fernández Ordóñez...*, *op.cit.*.

¹⁰⁸ Véase lo apuntado en la *nota 60*.

De cara a interpretar, de forma concreta, el significado de estos acuerdos políticos, sociales y económicos no sólo nos detendremos estrictamente en los Pactos de la Moncloa¹⁰⁹, sino en sus principales derivaciones en forma de normativas: Ley 50/1977, de 14 de noviembre, *sobre medidas urgentes de reforma fiscal*¹¹⁰ y el Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre, *sobre política salarial y empleo*¹¹¹. Dicho esto, y a partir de estos mismos hitos legislativos, se puede dar por inaugurada la nueva etapa de la historia del capitalismo español.

A la hora de evaluar los Pactos de la Moncloa nos vamos a detener en su primera parte: *Acuerdos sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía*, cuyos contenidos principales se fijan entre el 9 al 25 de octubre de 1977. Tal y como se ha insistido, en más de una ocasión, el significado fundamental, en términos históricos, de los Pactos de la Moncloa es la puesta de los pilares del *nuevo consenso liberal*. Junto con el Programa Económico de 1979, queda así dibujado el ideario económico capitalista de los gobiernos de UCD¹¹². Con una nota añadida de suma relevancia: con el apoyo de todas y cada de las fuerzas parlamentarias a los Pactos de la Moncloa, se finiquitaba definitivamente la ya desterrada posibilidad de cualquier intento de movimiento en pro de la “ruptura democrática”. Al respecto, las palabras preliminares de los propios *Acuerdos* son totalmente aclaratorias cuando se hacen constatar los *criterios previos*:

«Un primer aspecto en el que se ha alcanzado una base de entendimiento ha sido en el diagnóstico de la situación económica del país, calificada como grave debido a la confluencia de diversas crisis. La coincidencia en este diagnóstico debe servir, a juicio de los reunidos, de base para adaptar las medidas que, dentro de una economía de mercado, resultan imprescindibles para sanear y reformar la actividad económica y que puedan permitir su superación y consiguiente relanzamiento»¹¹³.

Con algún que otro toque pseudo-progresista –tan típicos de la UCD– como hablar que de que los “costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales” o llevar a cabo “[m]edidas dirigidas a impedir la especulación en materia de suelo urbano y urbanización y conducentes a facilitar el acceso al disfrute de la vivienda”; los Pactos de la Moncloa se daban “un periodo de dos años” para restablecer los “equilibrios fundamentales de la economía española”. Para que esto fuera posible, junto con el programa económico que allí se plantearía –y cuyas líneas maestras veremos a continuación– se hacía, en más de una ocasión, el correspondiente *guiño* de avanzar a un “clima de cooperación responsable”. O dicho con otras palabras: “la paz social”.

«Los representantes del Gobierno y de los distintos partidos políticos coinciden en que los objetivos anteriormente descritos resultarán inalcanzables si el país no toma conciencia de la gravedad de la situación y entiende que si las acciones expuestas se cumplen señalará el punto de partida de una nueva etapa que conducirá el asentamiento de un sistema económico estable que reduzca gradualmente las tensiones hoy existentes en la sociedad española»¹¹⁴.

Los ejes centrales de aquellos acuerdos económicos marcarán, a su vez, las líneas maestras de cuantos programas económicos –de corte liberal, se sobreentiende– se pongan en

¹⁰⁹ La cita completa de los denominados “Pactos de la Moncloa” sería la siguiente: “*Acuerdos de la Moncloa* (Madrid, 25-27 de octubre de 1977): *Acuerdos sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía* (criterios previos, 9 de octubre; *acuerdo*, 25 de octubre) y *Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política*, 27 de octubre, suscritos por el Gobierno y los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados (no publicados en el B.O.E.).

¹¹⁰ Ley 50/1977, de 14 de noviembre, *sobre medidas urgentes de reforma fiscal* [B.O.E. 16 de noviembre de 1977].

¹¹¹ Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre, *sobre política salarial y empleo* [B.O.E. 26 de noviembre de 1977].

¹¹² Nos remitimos aquí al apartado “4.2.3.3. La moderación programada (1979-1981)”.

¹¹³ PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, *Los Pactos de..., op.cit.*, pp. 19 y 20, respectivamente.

¹¹⁴ *Ibíd.*, p. 20.

marcha en adelante¹¹⁵. Así pues, y junto con algún soflama en torno a la moralidad pública – principalmente por la vía fiscal– los Pactos de la Moncloa centrarán su atención en los tres siguientes puntos: Política monetaria –mucho más flexible y sobre todo menos ortodoxa que la llevada a cabo por los gobiernos socialistas– política de rentas –vía control inflación, vía reducción costes de trabajo– y política de reducción del déficit público. Así pues, la *obsesión* – casi compulsiva– por el control de la inflación tiene su origen en octubre de 1977. Si se repasaba la *Segunda Parte* de los *acuerdos* en el apartado de “I. Política de saneamiento económico”, tras la elaboración del consabido diagnóstico/pronóstico acerca de la *crisis económica española* y se revisan el punto “a) Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social” así como el punto “b) Política monetaria”, se constata todo lo anterior. A lo que se va a añadir otro generoso paquete de *regalos empresariales*.

En dichos Acuerdos Económicos se incluyen también diferentes apartados que avanzan otras líneas maestras ante complicadas reformas que durante el tiempo de la UCD en el Gobierno, no se podrán llevar a cabo, de forma, plena ante su debilidad política. Ahí está por ejemplo el apartado VI “Reforma de la Seguridad Social”, con una especial atención al Seguro del Desempleo o las pensiones.

En lo que nos ocupa –la historia de la contratación temporal– los Pactos de la Moncloa van a venir a reformular algunas modalidades de contratación, que no se habían vuelto a *tocar* desde octubre de 1976. En cualquier caso, en dicho texto se retoma tal cuestión de una forma lo suficientemente abierta, que casi cualquier interpretación puede hacerse por más que la *orientación flexibilizadora* se sobreentienda. Objetivo: evitar cualquier tipo de conflicto antes y durante la negociación. Así se puede leer:

«Se adoptarán las medidas paralelas que aseguren una prestación eficaz y rigurosa del seguro de desempleo y un tratamiento prioritario de las modalidades de creación de puestos de trabajo, atendiendo especialmente al empleo juvenil, contratación temporal de los acogidos al subsidio de paro sin pérdidas de sus derechos y a las áreas geográficas de mayor índice de desempleo».

De esta forma el punto “e) Empleo” de los *Acuerdos Económicos* no se cierra ningún camino de un *posible* posterior desarrollo legislativo al respecto. Asimismo, se evitaría hablar de qué tipo de empleo se habría de buscar y/o alcanzar, sin incidir en matices del tipo se “buscará la estabilidad” o la “creación de puestos de trabajos fijos”, tan típicos de futuros acuerdos sociales. Tampoco se ofrece más datos, más allá de las contenidas en el punto 2 del epígrafe a) cuando se indica como “[d]urante 1978 se orientarán preferentemente los gastos públicos hacia el mantenimiento de la ocupación”. Especificando a continuación: “A este respecto se incrementarán los gastos estatales de inversión en un 30 por 100. Además, el Estado contribuirá con 60.000 millones de pesetas al seguro de desempleo y transferirá otros 40.000 millones a la Seguridad Social para compensar la reducción que se proyecta de sus cuotas”¹¹⁶.

Lo que sí queda bien claro es la política destinada a la reducción de los costes laborales, a través de dos vías: a) reducción de las cuotas de la Seguridad Social y bonificación de la contratación temporal. De esta forma en el punto 6 del apartado a):

«Se moderarán los incrementos de los costes de trabajo mediante un menor crecimiento de los cuotas de la Seguridad Social, las cuales no podrán aumentar durante 1978 en más de un 18 por 100 respecto a 1977».

Acompañándose tal política con lo que se indica en la segunda parte del punto 1 del epígrafe e):

¹¹⁵ Véase aquí, en concreto, el trabajo de, ESTEFANÍA, Joaquín, *La larga marcha...*, *op.cit.*. Y en concreto el capítulo 3, “Los Pactos de la Moncloa: el compromiso histórico español” (pp. 117-181).

¹¹⁶ Real Decreto 656/1978, de 30 de marzo, *por el que se establecen medidas para agilizar la gestión del pago de las prestaciones por desempleo y para combatir el fraude en la percepción de las mismas* [B.O.E. 4 de abril de 1978].

«Para los casos de contratación temporal de acogidos al subsidio del desempleo a partir de 1 de noviembre de 1977 el Estado –con cargos a los recursos de la Seguridad Social– satisfará el 50 por 100 de las cotizaciones que se devenguen».

Queda así inaugurada oficialmente la más que generosa política de subvenciones estatales al sector privado, por el mero hecho de contratar a un demandante de empleo. Una política que sería empleada con prolijidad en lo referente a la cuestión del empleo juvenil. De hecho, a partir de los Pactos de la Moncloa esta cuestión comenzaría a ser tratada de forma más rigurosa. Así en el punto 2 del apartado 2) se indicaba:

«Al objeto de fomentar el empleo juvenil se autoriza, dentro de un programa experimental que se concretará, la contratación temporal por un plazo de máximo de dos años para los empleos derivados de los nuevos puestos de trabajo que se creen a partir del 1 de noviembre de 1977, siempre que los mismos se cubran con personas que desempeñen por primera vez un trabajo. Para estos empleos el Estado –con cargo a los recursos de la Seguridad Social– satisfará el 50 por 100 de las cotizaciones que se devenguen».

No tardaría en llegar el desarrollo normativo de los Pactos de la Moncloa en su vertiente económica y socio-laboral. Así pues, ni un mes pasaría de cara la publicación de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, *sobre medidas urgentes de reforma fiscal*¹¹⁷. En la que se puede y se debe considerar la normativa más valiente y progresista de todos los gobiernos de UCD –e inclusive, nos interrogamos, de todo ¿el periodo democrático actual tras el postfranquismo?– con una influencia decisiva de Francisco Fernández Ordóñez, se detallaba todo un programa de política fiscal, que venía a romper con la normativa franquista al respecto, e introducían las bases legales para la modernización de la Hacienda Pública¹¹⁸.

Una normativa que aquí ha de citarse porque introduce en su apartado “IV. Fomento fiscal al empleo” un punto clave de cara a la continuada política reducción de los costes laborales. Tanto es así que estamos ante una apreciable novedad en términos históricos en relación a su artículo 25, en donde se inauguraría –como acabamos de advertir– una nueva vía en dicha política. Así pues, junto con las subvenciones previstas en relación a los fondos de la Seguridad Social, sumadas a la reducción de las cuotas, se abre un tercer camino para abaratar el coste de contratar: la reducción fiscal del Impuesto de Sociedades. La política de los *regalos empresariales* de UCD comienza a cobrar fuerza y contenido:

«Artículo 25.1. Se crea el Fomento Fiscal al Empleo, en virtud del cual, las personas físicas sujetas a la Cuota de Beneficiarios del Impuesto Industrial, a la Cuota proporcional de la Contribución Territorial Rustica y Pecuaria y las Entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades podrían deducir de las cuotas de los respectivos impuestos el veinte por ciento de la retribución correspondiente a cada nuevo puesto de trabajo efectivamente incrementado, siempre que su retribución no exceda el doscientos cincuenta por ciento del salario mínimo».

Una *deducción* prácticamente universal en tanto en el artículo 25.4 se dice: “Los preceptos de este artículos serán aplicables a todas aquellas Empresas que contraten trabajadores fijos o eventuales por más de seis meses, que se encuentren en situación de desempleo”.

El nódulo principal del *pack reformista* de los “Pactos de la Moncloa” se completara en esta vertiente a los pocos con el Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre, *sobre política salarial y empleo*¹¹⁹. Una vez más la vía rápida del Real Decreto-Ley sería la *opción normativa* elegida. Resulta de interés observar la contundente *Exposición de motivos*, pues en ella hay un intento de justificar la propia naturaleza del Real Decreto-Ley. Tras calificar de “grave” la situación económica y hablar de los “principios de una moderna economía de mercado”, se deja muy claro como los Pactos de la Moncloa constituirán, de ahí en adelante, la “única política posible”.

¹¹⁷ Ley 50/1977, de 14 de noviembre, *sobre medidas urgentes de reforma fiscal*.

¹¹⁸ Nos remitimos aquí, en concreto, al apartado “7.2.1. El trienio reformista (1982-1985)” y al apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

¹¹⁹ Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre, *sobre política laboral y empleo*.

«En el contexto de tales acuerdos, la política de rentas constituye un elemento esencial del proceso de saneamiento que, de forma urgente e ineludible, ha de acometerse para superar la crisis económica actual y en el marco de esa política de rentas donde la moderación del ritmo de crecimiento de los salarios, acompasada a los aumentos de precio previsibles constituye una pieza clave en todo el proceso de superación de la crisis».

Constituidas las primeras Cortes democráticas, el propio RD-L 43/1977 mucho se cuidara en dejar bien claro que, a pesar de las *razones de urgencia*, se pretende garantizar el “principio de libertad de las partes”, en relación a las materias constitutivas de negociación colectiva. En cualquier caso, lo que se persigue con tal normativa es claro: atajar la inflación vía reducción del control y reducción de los salarios. Pero también en este RD-L se introducirá en su artículo 3 el cambio de medición de la inflación –de la pasada a la prevista– y que a la postre se convertirá en el más eficaz instrumento de reducción de los costes laborales durante el actual periodo democrático¹²⁰. Junto con algún que otro *regalo* de la UCD a la clase empresarial del país –una clara reminiscencia gremial, tal y como sucede con el artículo 6 del RD-L 43/1977– también se *arma legislativamente* a los empleadores de los instrumentos necesarios en caso de que la negociación colectiva se les pudiera “ir de las manos”. La supuesta balanza equitativa con la que se ha querido presentar a los Pactos de la Moncloa se viene, pues, abajo cuando se lee con atención el citado artículo 6:

«Uno. Cuando la superación de una empresa de los criterios salariales de referencia establecidos en este Real Decreto-Ley se debiere a demandas o exigencias planteadas por sus trabajadores en la negociación, quedará autorizada aquella para la reducción de la plantilla hasta un máximo de un cinco por ciento de sus efectivos. A este fin la empresa efectuará las advertencias oportunas, haciendo constar en el convenio, en el documento de adhesión al mismo, o en el texto que refleja, en su caso, el final de la negociación, su reserva del derecho de reducción de plantillas.

La resolución del contrato de trabajo del personal afectado por la reducción de plantilla tendrá carácter automático y se efectuará mediante la comunicación que hará la empresa interesada a la autoridad laboral administrativa y la confirmación de su procedencia por esta, con una indemnización expresa al trabajador a cargo de la empresa equivalente a dos semanas de salario por cada uno o fracción del año de prestación de servicios a la misma.

[...]

Cuarto. Las empresas que superen los criterios salariales de referencia, debido a las causas señaladas, en el número uno de este artículo y apliquen efectivamente la reducción de plantilla en el máximo permitido, no perderán los beneficios que se expresan en el artículo sexto ».

Lo anterior se puede traducir de muchas maneras. En nuestra opinión, se trata de la necesaria cobertura legal para el despido libre, no gratuito pero si subvencionado por el Estado. Todo un logro para la clase empresarial de España, que comenzará a comprobar por sí misma como los gobiernos de UCD iban a garantizarles sus privilegios históricos, tras el *sueño dorado* del paternalismo franquista.

Como hemos visto hasta ahora tanto los gobiernos de la Monarquía como el primer Ejecutivo de UCD, se mostraron más preocupados por asegurar la liberalización y la bonificación del mecanismo de *salida* que el de *entrada*. A fin de cuentas, lo que se buscaría, básicamente, sería facilitar el despido en un momento de una intensa destrucción de empleos.

No obstante, si bien los Acuerdos Económicos de la Moncloa no prestarían en su momento una especial atención a la cuestión de la temporalidad, también ha de remarcarse como a partir de los mismos empezarán a promulgarse las conocidas como “cuñas flexibilizadoras”. Se inicia así un tiempo de desordenada promulgación de numerosos decretos

¹²⁰ «3.1. El criterio salarial de referencia establecido en el apartado primero del artículo primero podrá revisarse a partir del treinta de junio de mil novecientos setenta y ocho, si el crecimiento del Índice de Precios al Consumo en junio del referido año supera, respecto a diciembre de mil novecientos setenta y siete, el once como cinco por ciento». Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre, *sobre política laboral y empleo*. Asimismo véase lo apuntado en el apartado “8.2.1. La «obsesión enfermiza»”.

leyes para adaptar el Derecho del Trabajo a la crisis económica, dentro de la incipiente lógica liberal.

Las citadas *cuñas* van a ir introduciendo progresivamente las bases de la flexibilidad, sobre las que se asienta las actuales relaciones capital-trabajo¹²¹. *Cuñas* caracterizadas por “cuestionar el principio de estabilidad y reiterar un fomento a la contratación de tipo subjetivo”¹²². Consecuencia directa de lo anterior sería el desmontaje progresivo del aparato garantista de la LRL cuando ni siquiera se había desarrollado en términos legislativos.

El sentido de estas *cuñas flexibilizadoras* es claro: el aumento de la flexibilidad cuantitativa posibilitando la contratación temporal sin causa, es decir, tanto si la naturaleza del trabajo es indefinida como temporal. Con una doble característica que como veremos se va a hacer también común tanto del lenguaje empleado en cada una de las reformas laborales así como de los usos y prácticas empresariales: por un lado, ya se indica claramente como los principales destinatarios de tales medidas serían los jóvenes o los perceptores del subsidio del desempleo; y por otro se consolida el incesante proceso de bonificaciones, desgravaciones y/o subvenciones de los empresarios a la Seguridad Social por emplear este tipo de contratos. Los argumentos aquí no variarán sustancialmente en adelante, aunque algunos serán más explícitos que otros.

Por lo demás, y como ha destacado Ignacio Flórez, estas cuñas basarán parte de su poder argumental en la “justificación por la que se sacrifica este principio es fundamentalmente la creación de empleo, ante el alarmante incremento de la cifra de desempleados que se estaba produciendo en España”¹²³. Igualmente debe tenerse presente que todavía se está en un momento histórico en que la crisis económica se interpreta y se entiende como coyuntural, y por lo tanto se justifica esta mayor laxitud con la temporalidad como medida también temporal en el tiempo.

Justamente en las disposiciones adicionales del RD-L 43/1977, se dejaría apuntado el desarrollo futuro de lo acordado en los Pactos de la Moncloa¹²⁴. Con una nota a tener en cuenta. El recordatorio del artículo 15 de la LRL y la especificación de que la contratación temporal estará destinada a los “trabajadores acogidos al Seguro de Desempleo”, en una clara limitación que a lo largo de las futuras actuaciones se iría desarmando.

¹²¹ O en palabras del propio Ignacio Flórez Saborido: «la introducción mediante normas desordenadas de la flexibilidad frente a la crisis». FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal...*, op.cit., p. 52. Como veremos en las páginas siguientes, la introducción del aquí llamado ‘modelo de flexibilidad’ se llevaría a cabo como *la única política posible* con la que hacer frente a la crisis económica, y siempre en el mismo sentido que impondría la *nueva lógica del mercado*.

¹²² *Ibídem*.

¹²³ *Ibídem*.

¹²⁴ «Disposición adicional. Primera. La contratación temporal, por parte de las Empresas de trabajadores acogidos al Seguro de Desempleo, tendrá carácter de contratación de duración determinada de los contemplados en el artículo quince de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril. El Gobierno, en el plazo máximo de un mes, establecerá mediante Decreto, el régimen de dicha contratación. Este régimen se regulará por la cotización de la Seguridad Social que será asumida por el Estado, con cargo a los recursos de la Seguridad Social, en el cincuenta por ciento de la cotización y se fijarán los dispositivos que permitan garantizar la inclusión automática de estos trabajadores en el Seguro de Desempleo al cesar en la contratación temporal»; «Disposición adicional Segunda. El Gobierno, en el plazo de un mes, elaborará un programa experimental para el fomento del empleo juvenil. La contratación temporal que dentro de dicho programa se regule por el Gobierno tendrá el carácter de contratación temporal por plazo no superior a dos años y quedará comprendida en el régimen del artículo quince de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril. El Estado asumirá, con cargo a los recursos de la Seguridad Social, el cincuenta por ciento de la cotización». Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre, *sobre política laboral y empleo*.

En plena *vorágine reformista* se publicarían en el BOE antes de finalizar 1977 dos RRDD desarrollando el RD-L 43/1977. El primer, sería el referido a las bonificaciones sobre las cuotas de la Seguridad Social: Real Decreto 3280/1977, de 9 de diciembre, *por el que dictan normas sobre derecho de bonificación en las cuotas a la Seguridad Social*¹²⁵. Tras el recordatorio del fundamento del artículo 15 de la LRL, en el artículo 1 del RD 3280/1977, en el artículo 4 se establece una duración máxima de 2 años y una mínima de 2 meses, exclusivamente para los trabajadores perceptores de subsidio en la más clara limitación de este tipo de contratación temporal. Unos topes habituales y que, en breve, se modificarán. Junto con una serie de requisitos formales sería a través del artículo 8 así como en los siguientes en donde se especifican los alcances de las bonificaciones: “Artículo 8. La bonificación del cincuenta por ciento alcanzará, en los plazos a que se hizo mención, a las cuotas a la Seguridad Social que devenguen las empresas, incluidas las relativas a la contingencia de accidentes de trabajo”. Pero sobre todo esta normativa mostrará su preocupación por asegurar que una vez finalizado el contrato temporal, el trabajador pudiera disfrutar de su derecho al subsidio de desempleo, tal y como bien claro en el artículo 10¹²⁶.

Prácticamente, en paralelo, se va legislar en relación al empleo juvenil. En gran medida se terminan los primeros conatos que se puede entrever en la LRL y otras disposiciones, para pasar a tomarse el asunto de una forma más seria, pero sobre todo más global a la par que más sistemática. Por ello la publicación del Real Decreto 3281/1977, de 16 de diciembre, *sobre política salarial y empleo (sobre empleo juvenil) para el desarrollo de la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre*, adquiere una importancia determinante en esta historia de la contratación temporal en su versión juvenil¹²⁷. El diagnóstico que ofrece el Gobierno no deja lugar a muchas dudas:

«Dicha situación [crisis económica], al afectar a las expectativas de empleo, viene ocasionando efectos especialmente negativos en las posibilidades de ocupación y colocación de las personas jóvenes que pretenden acceder por primera vez a la vida laboral activa, motivo por el cual el Estado debe centrar su esfuerzo en el estudio, atención y fomento de la específica problema del empleo juvenil.

En este sentido, el Gobierno materializa y pone en ejecución los principios obtenidos con el consenso unánime de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, articulando, con la necesaria flexibilidad, un programa experimental de atención especial empleo juvenil. Con el fin de iniciar una actuación constante y eficaz en dicha materia, que, necesariamente, habrá de ampliarse y desarrollarse a otros muchos aspectos que inciden en la sugerente temática del empleo juvenil. Y sin perjuicio de la atención que habrá de prestarse a la política de empleo de otros grupos sociales».

Hoy esta declaración de intenciones puede parecer del todo común cuando las políticas de juventud y los programas de empleo juvenil han alcanzado tales cuotas, hasta considerarse como elementos centrales de las políticas sociales y laborales en nuestra sociedad. Pero no era así en diciembre de 1977, y por ello ha de tenerse presente el citado *salto adelante* en esta materia. Sólo así se puede interpretar adecuadamente el *tono prudente* –antes que limitativo– del citado RD 3281/1977. Una normativa que antes que nada lo que viene a establecer en su artículo

¹²⁵ Real Decreto 3280/1977, de 9 de diciembre, *por el que se dictan normas sobre derecho de bonificación en las cuotas a la Seguridad Social* [B.O.E. 26 de diciembre de 1977. Entrada en vigor: 1 de enero de 1978].

¹²⁶ «10. Conservación del derecho a reanudar el subsidio. Cuando algún trabajador contratado en la forma prevista en este Real Decreto cese en la Empresa que le contrató, se lo reanudará en el derecho de la percepción del subsidio por desempleo, o incluirá un nuevo derecho si hubiese consolidado los requisitos para su obtención, todo ello de conformidad con el Real Decreto-Ley quince/mil novecientos setenta y seis, de diez de agosto, y demás normas de aplicación». Real Decreto 3280/1977, de 9 de diciembre, *por el que se dictan normas sobre derecho de bonificación en las cuotas a la Seguridad Social*

¹²⁷ Real Decreto 3281/1977, de 16 de diciembre, *sobre política salarial y empleo (sobre empleo juvenil) para el desarrollo de la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre* [B.O.E. 26 de diciembre. Entrada en vigor: 1 de enero de 1978].

2 es un programa experimental, para lo cual además se prevé la creación de una “Comisión de Estudio” con los agentes sociales. Aquí de nuevo se opta por partir del artículo 15 de la LRL, planteando que la “duración del contrato de trabajo no sea superior a dos años ni inferior a seis meses, con carácter general” (artículo 3).

Es en los siguientes artículos en donde las *dosis de prudencia* mejor se ven reflejadas. Así en el artículo 4.1 se limitan tales contratos temporales a la edad de entre de 18 y “menores de la edad que se establecen en los siguientes apartados”. Condición previa para *optar* a tal posibilidad, sería que el demandante llevará 6 meses inscritos en la Oficina del Empleo y que no hubiera rechazado ninguna oferta de trabajo. Ya en el punto 4.2 se especifica que “[c]on carácter prioritario, el programa experimental atenderá al empleo de jóvenes con titulación de Formación Profesional [...] y siempre que no tengan más de vientos años o de veinticinco, en el supuesto de titulados universitarios de Grado Superior”. Pero a su vez en el artículo 4.3 también extiende –con sus respectivas cautelas– tales programas experimentales, “a solicitantes de puestos de trabajo, menores de veintitrés años de edad, que no estén en posesión de títulos académicos o profesionales que habiliten directamente para el ejercicio de actividades laborales en estos supuestos”. He aquí un paso cualitativo, en tanto se indica a continuación: “En estos supuestos, la obtención de empleo podrá ir acompañada de las necesarias acciones de Formación Profesional acelerada y de adaptación al puesto de trabajo a desempeñar, sin que la duración total del contrato de trabajador pueda ser inferior al doble del tiempo invertido en la formación profesional del trabajo, que habrá de compatibilizarse con prestación de trabajo”. Por último, en el artículo 7, en relación a las bonificaciones del 50% de las cuotas de la Seguridad Social, se añadía un punto nuevo punto: “b) Beneficios de asistencia técnica y material para acciones de formación, reconversión o adaptación profesional”.

Pese a las limitaciones, garantías y concretamente la relativa *prudencia* de tales Reales Decretos, nos encontramos con una normativa que van a venir a cuestionar el principio de estabilidad en el empleo –a través de la contratación temporal no causal– y que “se caracterizan por mantener un carácter eminentemente subjetivo, puesto que se fomenta la contratación de colectivos muy determinados”¹²⁸. También queda claro que los jóvenes comienzan a ser empleados como *argumento* pero también como *pretexto*, de cara a la ampliación fáctica de la contratación temporal. Así el argumento/pretexto del empleo juvenil, a la postre, se convertiría en el verdadero “laboratorio de pruebas” tanto de la expansión de la contratación temporal como de las *cuñas flexibilizadoras*.

Ni cinco meses pasarían cuando el Gobierno de UCD –entonces ya con Rafael Calvo Ortega al frente del Ministerio de Trabajo (febrero 1978-mayo 1980) y con Fernando Abril Martorell en Economía (febrero 1978-febrero 1979)– volvería a reestructurar la normativa para este colectivo. La rectificación a la par que ampliación vendría de la mano del Real Decreto 883/1978, de 2 de mayo, *de promoción del empleo juvenil*¹²⁹. Todo un *hito* en esta “historia de la contratación temporal”. En un inusual tono crítico en la *Exposición de motivos*, se comenzaba reconociendo como el RD 3281/1977, “ha evidenciado que en el Programa Experimental [...] existen exigencias y disposiciones que limitan en alguna medida la eficacia y operatividad de dicho programa experimental”. A lo que se añadía: “Asimismo se ha acreditado la conveniencia de modificar las edades de los trabajadores contenidas en el programa, el requisito de una larga inscripción previa en las respectivas Oficinas de Empleo, los beneficios para las empresas y la bonificación de cuotas a la Seguridad Social”. Además se constataba otro fracaso: la no puesta en marcha de la Comisión de Estudio, remarcando la necesidad de la misma. La solución:

«En síntesis, el presente Real Decreto incorpora lo que da útil y válido contenía el Real Decreto anterior, de suerte que, en virtud de la amplia fórmula el contrato consiente, éste pueda realizarse con o sin concierto previo, pero, en caso de existir el mismo liberándole de trabas que dificultan su eficacia y hasta su existencia; y, de otro lado, ante ese estado de cosas, deroga el

¹²⁸ FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal...*, op.cit., p. 57.

¹²⁹ Real Decreto 883/1978, de 2 de mayo, *de promoción del empleo juvenil* [B.O.E. 3 de mayo. Entrada en vigor: 4 de mayo].

Real Decreto anterior y establece una nueva línea de promoción del empleo juvenil, más acorde con las enseñanzas recibidas».

Se procedería, pues, a eliminar las limitaciones contempladas en el artículo 2.1 del RD 3281/1977 a la hora de realizar los conciertos oportunos, tanto por zonas geográficas, sectores productivos o tipología de empresas a través del también artículo 2.1. En el artículo 3 se decía como se podría desarrollar el programa experimental “mediante contratos individuales entre partes o cualquier otra forma de actuación, sin necesidad de concierto previo”. En cualquier caso, se mantenía tanto la duración mínima como máxima en base al artículo 15 de la LRL. Ahora bien, se reducía la edad aplicable al programa experimental a los 16 años hasta los 26 años, y tan sólo había que estar inscrito 15 días en la correspondiente oficina de empleo. Pero también por el lado de las bonificaciones a la Seguridad Social éstas se elevaban hasta el 75% (artículo 7a), a la par que se detallaba con mayor precisión las ayudas técnicas (artículo 9). Finalmente, y esto constituía otra notable novedad en el artículo 11 se planteaba lo siguiente: “Se desarrolla la red de Centros de Orientación e Inserción Profesional y Laboral del Servicio de Empleo y Acción Formativa”. De este modo, las políticas de fomento del empleo juvenil a la par que cobraban cuerpo, iban flexibilizándose y liberalizándose ante la constatación de su necesidad pero también de su muy escaso empleo real. No sería ni la primera ni la última modificación al respecto.

Políticamente 1978 estaría marcado por las negociaciones fuera y dentro del Congreso de cara a la redacción de la Constitución. Mientras tanto, a nivel económico la crisis no dejaría de remitir aunque mejorarán algunas macromagnitudes. Aquí el *impulso* todavía vivo de los Pactos de la Moncloa les será especialmente útil a los gobiernos de la UCD de cara a mantener una similar línea de actuación con un cierto grado de estabilidad. Una relativa estabilidad que se mantendría también a nivel de la norma jurídico-laboral en lo restante del año.

De tal forma, que antes de iniciarse a mediados de 1979 los primeros pasos de lo que se denominarían más adelante los *acuerdos sociales* tras las elecciones legislativas de marzo de aquel mismo año, se continuarán a grandes rasgos con los ejes normativos y de política económica ya mencionados. Asimismo, ha de destacarse que a pesar de que durante 1978 el ritmo movilizador del movimiento obrero disminuiría en comparación con 1977 –el efecto de los Acuerdos Económicos de la Moncloa es indudable– sería este un año con cerca de 1.200 huelgas convocadas, con casi 4 millones de trabajadores movilizados y más de once millones de jornadas de trabajo pérdidas¹³⁰. A lo que ha de añadirse movilizaciones como la Huelga General del 5 de abril de 1978, que convocada a nivel europeo por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y apoyada en España por CCOO y UGT, lograría movilizar a cuatro millones de trabajadores, según los propios sindicatos¹³¹. O también movilizaciones obreras como la ocurrida en Barcelona un 18 de mayo por la negociación colectiva con cerca de un millón de trabajadores manifestándose.

Así pues, la segunda fase de los Pactos de la Moncloa –en su vertiente económica– vendrá de la mano del Real Decreto-Ley 49/1978, de 26 de diciembre, *sobre política de rentas y empleo*¹³². Más allá de la novedad legislativa laboral que pretende introducir –los contratos a tiempo parcial– resulta de interés detenerse tanto en su *Exposición de motivos* como en algunos de sus artículos. Tras destacar como se pretendía continuar por la senda acometida un año antes –“en el más estricto cumplimiento de los Pactos de la Moncloa”– no faltarían las auto-alabanzas: “Ese esfuerzo de todos ha permitido, junto con un creciente grado de integración social, un positivo ajuste de determinados desequilibrios económicos”. Así sería. Por ejemplo, se conseguiría reducir la inflación anual de un 24,5% de 1977 a un 19,8% en 1978; el PIB

¹³⁰ Véase lo apuntado en la *nota 46*.

¹³¹ Noticia, “El desempleo moviliza a cuarenta millones de trabajadores”, *El País*, 6 de abril de 1978.

¹³² Real Decreto-Ley 49/1978, de 26 de diciembre, *sobre políticas de rentas y empleo* [B.O.E. 27 de diciembre de 1977].

mejoraría en más de un punto y se controlaría otras tendencias inflacionistas. De tal forma, que “frente a mil novecientos setenta y nueve [permite operar] con unos márgenes de maniobra reducidos, pero más amplios que los del pasado año”.

El diagnóstico venía a ser similar, aunque ya quedaba claro que el principal objetivo – hasta convertirse en prácticamente el único– pasaba por una “reducción progresiva de la tasa de inflación, a la que debe adaptarse la política monetaria y financiera, y con un ajuste de los salarios monetarios compatible con la generación de empleo y la disminución del paro”. Las prioridades quedaban así definidas. “Ello implica, necesariamente, el reconocimiento de la necesaria moderación de los comportamientos en materia de rentas, lo cual no excluye en modo alguno la progresión en términos reales de las mismas”. Era lo que se denominaba unas líneas más adelante “elegir una vía segura”.

En todo caso, aquel esquema de actuación se plantearía como un *falso dilema*:

«Por ello, entre la doble opción de una política monetaria restrictiva que evite los problemas del sector exterior y asegure los avances en la inflación, pero con alto costo en términos de empleo, o una política monetaria más fluida, compatible con una tasa de inflación reducida y un nivel de inversión más dinámico, el Gobierno ha optado claramente por una segunda vía [...]. A su vez, la intervención del Estado en el proceso de definición del nivel nominal de las rentas debe restringirse al área que le es privativa, respetando en cada momento la libertad de las partes en los procesos de negociación en los que no están implicados directamente los intereses públicos».

Así quedaba reducido el margen de maniobra: ortodoxia limitada, pero ortodoxia a fin de cuentas, con una política de moderación de rentas por delante. Todo ello con un añadido que no se había visto en las anteriores normativas la defensa de una “política activa de inversiones como puente y apoyo de la inversión privada”¹³³.

Todavía en aquel tiempo en las normativas se hablaba de “garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores” (artículo 1) lo que no era poco visto lo que vendría después. Un poder adquisitivo que para 1979 se estimaba en un 13%, en una banda salarial entre el 11% al 14% –la inflación al terminar aquel año sería del 15,7%, es decir, se perdería una media superior a dos puntos–. Por lo demás, se mantendría, de nuevo, el “derecho de reducción de las plantillas” (artículo 5) establecido por el Real Decreto-Ley 43/1977. Y como también se adelantó en el artículo 7 se hablaría por vez primera –en tiempos democráticos– de la posibilidad de avanzar de forma experimental en torno al contrato a tiempo parcial. Una posibilidad que no llegaría a ponerse en marcha hasta la aprobación del ET, en otro claro ejemplo de la provisionalidad de todas estas medidas¹³⁴.

Inaugurado el año setenta y nueve se aprobarían en relación a esta etapa las dos últimas medidas relacionadas con la contratación temporal, tanto para los perceptores de subsidio como las relacionadas con el empleo juvenil. Con el Real Decreto 41/1979, de 5 de enero, *de promoción de empleo juvenil* se volvería a introducir una nueva *cuña flexibilizadora*¹³⁵. “La experiencia obtenida durante la aplicación de los Reales Decretos citados aconseja introducir determinadas precisiones en el tratamiento del tema, por lo que se ha estimado oportuno proceder a la redacción de un nuevo texto legal”, se indicaba en la *Exposición de Motivos*. ¿Cuáles serían aquellas modificaciones? Sencillo: la universalización de la contratación

¹³³ En este sentido ha de leerse otro de los *regalos empresariales* de UCD: Real Decreto 3061/1979, de 29 de diciembre, *por el que se regula el régimen fiscal de la inversión empresarial* [B.O.E. 23 de enero de 1980].

¹³⁴ «Artículo 7. Se faculta al Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo, para regular, con carácter experimental, contratos a tiempo parcial, que tendrá el carácter de contratación de duración determinada de los contemplados en el artículo quince de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril». Real Decreto-Ley 49/1978, de 26 de diciembre, *sobre políticas de rentas y empleo*.

¹³⁵ Real Decreto 41/1979, de 5 de enero, *de promoción de empleo juvenil* [B.O.E. 12 de enero de 1979. Entrada en vigor: el 13 de enero de 1979].

temporal para este colectivo, según su propio artículo 1, que establece claramente la des-causalización total:

«La contratación de trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veintiséis, a que se refiere el presente Real Decreto, tendrá siempre el carácter de contrato temporal y duración determinada, cualquiera que sea la naturaleza del trabajo a realizar, de acuerdo con el Real Decreto-Ley cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, de veintiséis de diciembre».

Aunque no se toca ni la duración ni otros límites, no muchas más novedades se pueden rastrear en el RD 41/1979 –claro está junto con el citado enorme salto normativo que se produce–; a lo sumo, las mayores facilidades para cobrar la modificaciones o la redacción del nuevo artículo 9: “El Instituto Nacional de Empleo prestará gratuitamente la formación profesional de los trabajadores a que se refiere este Real Decreto, cuando sea solicitada por las Empresas”.

Otro tanto va a suceder con la otra vía de la contratación temporal con la publicación del Real Decreto 42/1979, de 5 de enero, *sobre contratación de trabajadores perceptores de subsidio del desempleo*¹³⁶. De entrada, se emplea la misma *Exposición de Motivos* y en el artículo 1 se dice textualmente:

«La contratación de trabajadores perceptores del subsidio por desempleo, a que se refiere este Real Decreto, tendrá siempre carácter temporal y por duración determinada, de cualquiera que sea la naturaleza del trabajo a realizar, de acuerdo con el Real Decreto-Ley cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, de veintiséis de diciembre, y cualquiera que sea la naturaleza del trabajo a realizar».

Por más que se amplía el límite inferior –de 60 días a 4 meses– la orientación es evidente: universalización total y sin ningún tipo de cortapisas. Se entierra así el siempre débil legado proteccionista de la LRL. Un ejemplo de lo anterior es la redacción de un nuevo párrafo en el artículo 2, en donde se endurece gravemente la legislación para aquel trabajador que rechace una oferta de empleo –a modo de antecedente de lo que sucederá después con la Ley 51/1980–¹³⁷. O dicho con otras palabras, se procede a la culpabilización del asalariado por vía indirecta acerca de su condición de desempleado, limitándose su libertad individual de elección. A pesar de que se intenta mantener un débil equilibrio garantista –por ejemplo véase el artículo 6 al respecto de las empresas que hubieran llevado a cabo ERE– se terminan con todo rasgo de relativa *prudencia* que habían impregnado a las primeras normativas al respecto.

El balance normativo de todo lo anterior –como destacaría Ignacio Flórez– se hace palpable:

«Nos encontramos, por tanto, con una serie de normas, que al no componer un cuerpo legal único y al ser numerosas provocan un cierto desorden en lo relativo a la regulación del acceso del empleo. Sólo entre octubre de 1976 a enero de 1979 se promulgan tres Reales Decretos Leyes y cinco Reales Decretos, sin contar las Órdenes Ministeriales y Resoluciones que las desarrollan, lo que resulta un número excesivo para incentivar el empleo de determinados colectivos en el corto período de tiempo de dos años y tres meses»¹³⁸.

«La Ley regulará un Estatuto de los Trabajadores»

¹³⁶ Real Decreto 42/1979, de 5 de enero, *sobre contratación de trabajadores perceptores de subsidio de desempleo* [B.O.E. 12 de enero de 1979. Entrada en vigor: el 13 de enero de 1979].

¹³⁷ «Artículo 2. [...] La negativa por parte de los trabajadores seleccionados a aceptar puestos de trabajo adecuados a sus aptitudes profesionales implicara la suspensión por seis meses del derecho a las prestaciones básicas por desempleo, y su extinción si durante el citado periodo incurrieran de nuevo en la conducta indicada». Real Decreto 42/1979, de 5 de enero, *sobre contratación de trabajadores perceptores de subsidio de desempleo*. Véase lo apuntado en el Capítulo 8, *nota* 332.

¹³⁸ FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal...*, *op.cit.*, p. 55.

Artículo 35.2. Constitución de España¹³⁹.

El periodo de cierta estabilización económica se truncaría rápidamente tras la llegada de la segunda crisis del petróleo de 1979. Todas y cada una de las previsiones gubernamentales se vendrán abajo a una velocidad considerable, y en un momento en que la conflictividad laboral cobraría un nuevo impulso. La *fuerza de arrastre* política y económica de los Pactos de la Moncloa va a venir a tocar a su fin.

Tal es la situación que en el mes de agosto el Gobierno –con Jaime García Añoveros al frente de Hacienda (abril 1979-diciembre 1982)– se ve obligado a aprobar el muy discutido como combatido Real Decreto 1955/1979, de 3 de agosto, *sobre revisión del criterio salarial de referencia establecido en el artículo primero del Decreto-Ley 49/1978, de 26 de diciembre*¹⁴⁰. El objetivo: dar respuesta no sólo al repunte inflacionista sino contener la progresiva subida salarial que ha venido arañando, convenio por convenio, en un contexto de permanente movilización. Dicho en otras palabras, evitar que las previsiones económicas de los Acuerdos Económicos queden en papel mojado a la par que garantizar la cada vez más cuestionada *paz social*.

En este preciso contexto de creciente desestabilización política, económica y laboral, será donde se comienza a negociar las bases del futuro Estatuto de los Trabajadores. Aunque la cuestión de la contratación temporal no se volverá a tocar hasta la aprobación de la Ley 8/1980, y de forma específica, hasta su desarrollo legislativo durante los primeros meses de 1980; lo que va a acontecer en la segunda mitad del años setenta y nueve es clave para entender en qué contexto y en qué correlación de fuerzas se negociarán los límites normativos de los mecanismos de entrada, de permanencia y salida del mercado laboral.

Cuando hablamos de conflictividad y nos referimos a 1979 se ha de constatar que se está ante el año más conflictivo del último medio siglo del actual régimen democrático. Según datos del propio Ministerio de Trabajo se convocarían 2.680 huelgas, con más de cinco millones y medio de trabajadores implicados y se perderían más de dieciocho millones de jornadas de trabajo. Un marco de actuación en donde la correlación de fuerzas entre capital-trabajo volverían a reequilibrarse de forma notoria. El poder de convocatoria de un crecido movimiento obrero –principalmente por y a través de CCOO– llegaría a ser tal que cuestionaría la propia estabilidad del débil proceso democrático. Un hecho, prácticamente, único junto con lo que acontecería durante el I Trimestre de 1984. Por más que este episodio histórico haya quedado relegado en la muy pobre historia del movimiento obrero tras el fallecimiento del franquismo, no debe minusvalorarse en ningún caso¹⁴¹.

Tras el proceso de desmovilización, tanto desde *arriba* como desde *abajo*, durante los primeros meses de 1976 –lo que a la postre permitiría sobrevivir a los gobiernos de la Monarquía y fracturar la posibilidad de la llamada *ruptura democrática* por la vía de la movilización social generalizada– sería tanto 1979 como años más tarde en 1984, cuando la tesis de la hegemonía gramsciana de la conquista del poder político mediante la previa conquista de la hegemonía social más cerca estuvo de verse realizada. Ahora bien, se demostraría también que frente a la posible desestabilización del sistema en su conjunto, no había alternativa viable ni posible que pudiera llegar a tomar el poder político¹⁴².

¹³⁹ Véase aquí, RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, *Los trabajadores y la Constitución*, Madrid, Sociedad de Estudios Laborales, 1980.

¹⁴⁰ Real Decreto 1955/1979, de 3 de agosto, *sobre revisión del criterio salarial de referencia establecido en el artículo primero del Real Decreto-Ley 49/1978, de 26 de diciembre* [B.O.E. 14 de agosto de 1979].

¹⁴¹ Véase lo apuntado en la *nota 6*.

¹⁴² Véase, en este sentido, tanto la *nota 46* como lo apuntado y desarrollado en las *Conclusiones* de la presente tesis doctoral.

Es a partir de estos puntos en donde ha de contextualizarse el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) que firmarían UGT y CEOE, el 10 de julio de 1979, como el antecedente directo del futuro ET¹⁴³. Y un tiempo más tarde, aunque también dentro de esta misma lógica, el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) firmado también por UGT y la CEOE, el 5 de enero de 1980¹⁴⁴. Acuerdos en donde UGT iría adquiriendo la experiencia necesaria y que pronto desarrollaría con un alto nivel de intensidad, hasta que en tiempos de la primera legislatura socialista se convirtiera en el principal *agente desmovilizador* dentro del propio movimiento obrero¹⁴⁵.

Tanto el ABI como AMI se transformarían en los puntos de arranque de la posterior mistificación de la historia de la concertación social. Una historia que ha ido, en paralelo, a la construcción del relato canónico de la transición, y que como veremos sus consecuencias directas e indirectas irían mucho más allá de la mera cuestión normativa.

Pero antes de llegar a los mismos, los sindicatos mayoritarios –UGT y CCOO– pondrían en marcha las primeras negociaciones conducentes a los primeros Acuerdos Base para la Negociación Colectiva a nivel estatal tras la dictadura en el año setenta y nueve. Todo otro acontecimiento histórico. Nos referimos, pues, a los *antecedentes olvidados* tanto del ABI como del ET, siendo hoy incluso difícil su localización documental¹⁴⁶. Se está, por tanto, en los preámbulos de una todavía *joven* negociación interconfederal.

Aprobada la Constitución y concretamente el artículo 35.2 –junto los artículo 7¹⁴⁷, artículo 28.1¹⁴⁸, artículo 28.2¹⁴⁹, artículo 37.1¹⁵⁰ o el artículo 37.2¹⁵¹ entre otros– también dará

¹⁴³ A diferencia del resto de acuerdos sociales, pactos sociales, acuerdos interconfederales... que conforman el proceso de concertación social, el ABI no se publicaría en el BOE. En todo caso, el texto del ABI resulta fácil de localizar. En esta investigación se ha empleado indiferentemente los textos aparecidos en: COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de...*, op.cit., pp. 77-82; SARACÍBAR, Antón [et al.], *25 años del Estatuto...*, op.cit.,

¹⁴⁴ Resolución del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación *por el que se acuerda la publicación del Acuerdo Marco Interconfederal para la negociación colectiva suscrito por la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)* [B.O.E. 24 de enero de 1980].

¹⁴⁵ Nos remitimos aquí al Capítulo “12. La «necesidad hecha virtud»: el difícil parto del Acuerdo Económico y Social (febrero-diciembre 1984)”.

¹⁴⁶ Todos y cada uno de los aquí denominados ‘antecedentes olvidados’ se han localizado en, COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de...*, op.cit..

¹⁴⁷ «Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». CE.

¹⁴⁸ «Artículo 28.1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas Armadas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato». CE.

¹⁴⁹ «Artículo 28.2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar su mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». CE.

¹⁵⁰ «Artículo 37.1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios». CE.

comienzo el proceso de la futura elaboración del Estatuto de los Trabajadores. Si ya en la primavera –a principios de abril– se comienzan a filtrar los primeros borradores del futuro ET desde el Ministerio de Trabajo, los cuales van a levantar todo tipo de suspicacias sindicales; éstas se verán confirmadas cuando es aprobado el proyecto gubernamental el 1 de junio por el Consejo de Ministros. El citado proyecto que entrara en el Congreso de los Diputados el 22 de junio, siendo enviado el martes de 26 de junio a la Comisión de Trabajo y publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 4 de julio, tan sólo ratifica los ya extendidos temores de un potencial Estatuto de los Trabajadores con clara preferencia por el lado *del capital*. Hasta llegar aquí, en todo caso, también existen un conjunto de antecedentes que generalmente han sido, a su vez, omitidos.

Meses antes, concretamente el 27 de febrero, se firmaría el Acuerdo de Base sobre Negociación Colectiva entre UGT, CCOO y COPYME –antecedente directo de CEPYME–, con la ausencia de la CEOE¹⁵². Lo interesante de aquel primer acuerdo –el primer “antecedente olvidado”– es que se comienza a bosquejar los primeros esquemas de la estructura de la negociación colectiva, pero también de los derechos sindicales dentro de la empresa –véase, al respecto su punto “2. Derecho Sindicales” en donde se habla largo y tendido de Comités de Empresa y Delegados de Personal o de las Secciones Sindicales– y en donde el espíritu del mandato del artículo 35.2 está más que presente. Pero aquel primer Acuerdo Base también tiene otra preocupación que se observa claramente en su particular *Exposición de Motivos*: “[Los] abajo firmantes, adoptan los siguientes criterios que recomendarán a sus miembros asociados, con el fin de distender la actual coyuntura de las relaciones laborales, que perjudica, claramente, a la situación económica y social del país”. En ese mismo texto queda claro las causas de la no firma de la CEOE: “[Y], en especial, al mayoritario contingente de trabajadores de la pequeña y mediana empresa, así como a las mismas, debido a la difícil situación por la que atraviesa este tipo de empresas, alejadas del juego de los grandes intereses que dominan el país”. Todavía más, pues se dice que los firmantes “buscarán la máxima flexibilidad y moderación de los aumentos salariales, de acuerdo con las empresas sujeto de Convenio”. Todo un mensaje en línea con los Pactos de la Moncloa en una coyuntura complicada y laboralmente difícil, en tanto se está a escasos meses de las elecciones legislativas a la par que en la negociación colectiva de 1979.

También se localiza en aquel Acuerdo de Base un punto “3. Política de empleo” en donde se detallan una serie de medidas de cara a incorporarlas a los Convenios Colectivos, como la jubilación, las horas extraordinarias o las vacaciones. Aunque con escaso detalle y desarrollo en el mismo documento, se llegarían a plantear cuestiones tan novedosas como las contenidas en el punto “4. Absentismo y productividad” para lo cual se establecen una serie de Comités Mixtos específicos. En resumen, se esboza un primer panel de posibles medidas de desarrollo del mandato constitucional con la vista puesta tanto en la discutida Ley de Acción Sindical como pensando en el futuro “Código del Estatuto de los Trabajadores”.

Sin que se hubiera iniciado la negociación propiamente dicha del ET, UGT y CEOE firmarían el ABI, un 10 de julio de 1979. Aquel mismo día también se firmaría el “II Acuerdo Interconfederal” entre CCOO y COPYME –como el segundo “antecedente olvidado”¹⁵³– y veinte días más tarde el “III. Acuerdo Interconfederal” entre la CS de CCOO y CEPYME –el

¹⁵¹ «37.2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad». CE.

¹⁵² “Acuerdos de Base sobre Negociación Colectiva”, firmado por UGT, CCOO y COPYME, el 27 de febrero de 1979. Texto completo en, COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de..., op.cit.*, pp. 67-71.

¹⁵³ “II. Acuerdo Interconfederal” firmado por CCOO y COPYME, el 10 de julio de 1979. Texto completo en, COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de..., op.cit.*, pp. 71-72.

tercer “antecedente olvidado”¹⁵⁴—. Antes de entrar en detalle sobre el contenido de los tres acuerdos –preámbulo todos de los futuros acuerdos interconfederales– conviene detenerse en las consecuencias históricas que acarrearía el ABI.

Mitificado en extremo por parte de la *memoria socialista*, el mismo permitiría a UGT superar su real situación de marginación y de aguda debilidad organizativa en los centros de trabajo –en especial las grandes y medianas empresas– así como su extendida debilidad orgánica institucional. Es gracias también al ABI en donde la central ugetista conseguiría ver reflejadas sus tesis –así como sus necesidades organizativas– al acordarse con la CEOE la mayor parte de sus propuestas en relación a las Secciones Sindicales. Objetivo prioritario para la central ante su escasa representación en los Comités de Empresa. Ha de tenerse bien presente que las propias Comisiones Obreras tras asistir a las primeras reuniones, terminaría abandonando la negociación tras constatare que las líneas maestras del ABI chocaban radicalmente con sus postulados sindicales.

También con el ABI, UGT va a iniciar el ensayo de un modelo de negociación al margen –cuando no en contra– de CCOO. Eso sí al coste de romper la siempre débil de *unidad de acción*, y por tanto, debilitar la potencialidad de las movilizaciones obreras que venían incrementándose en meses anteriores. En cierta medida, el modelo de negociación colectiva por la vía de los acuerdos interconfederales conllevaría, en adelante, la exclusión, marginación o directamente la auto-marginación de las Comisiones Obreras. Pero a su vez, el ABI supone un *balón de oxígeno* para un muy acuciado Gobierno de la UCD, que no pasaba por sus mejores momentos, y cuyas líneas económicas son cuestionadas duramente por la CEOE. Su único y potencial aliado. Y, no siempre, cabría añadir. Así la organización empresarial con la firma del Acuerdo Básico Interconfederal conseguiría no sólo plasmar buena parte de sus reivindicaciones, sino romper la citada *unidad de acción*. Propósito central tanto del Gobierno como de la patronal de cara a desinflar la creciente movilización del movimiento obrero. Una historia, por cierto, que se repetiría en más de una ocasión y de forma específica y destacada en el AES.

Agotado el impulso reformista de los Pactos de la Moncloa, el ABI, por tanto, va a querer ser empleado como el nuevo instrumento de cara a garantizar la “paz social”, a la par que ganar tiempo de cara a elaboración del Estatuto de los Trabajadores, cuya tramitación parlamentaria tan complicada se preveía. El punto 2 del ABI en relación a sus objetivos es del todo aclaratorio:

«Ambas partes tienen el convencimiento de que en la elaboración de las líneas que han de desarrollar los derechos sindicales y laborales contenidos en la Constitución y que, en definitiva, han de configurar el marco de relaciones laborales, es necesario recoger los criterios de las fuerzas sociales que protagonizan estas relaciones, agotando todos los medios posibles para tratar de llegar a puntos de coincidencia que eviten tensiones y enfrentamientos necesarios y con el objetivo de que la legislación que en su día se apruebe responda a las realidades que pretende regular, y tenga de esta manera garantizado un índice de aplicabilidad práctica que la haga eficaz».

En relación al futuro Estatuto de los Trabajadores se indicaría como tanto UGT como CEOE, “no han tratado de llegar a un acuerdo que se plasme en una redacción alternativa al proyecto de ley presentado por el Gobierno”. Afirmando a continuación como “se han limitado sus conservaciones acerca de los criterios generales y determinados puntos conflictivos contenidos en el proyecto de Ley”. Acuerdos que, en lo básico, se remitían a la autonomía de las partes, a la centralidad de los Convenios Colectivos, al principio de eficacia general... Es decir, se propone un *boceto* avanzado de los puntos sobre los que debería caminar el ET. Así en el punto 12 se decía: “UGT y CEOE, a través de una comisión técnica, desarrollarán y formularán los puntos de coincidencia relativo al Estatuto y que han quedado enunciados en este

¹⁵⁴ “III. Acuerdo Interconfederal” firmado entre la C.S. de COO y CEPYME, el 30 de julio de 1979. Texto completo en, COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de..., op.cit.*, pp.72-75.

documento”. No faltaría tampoco el canto oportuno a la paz social o cuando menos a la no agresión mutua –punto 6–:

«Como aplicación práctica de ello, UGT y CEOE se comprometen a proseguir en una política de no violencia, tanto sobre las personas como sobre los bienes, que de producirse originará [...] la inmediata suspensión de las negociaciones en curso hasta la desaparición de aquella».

No obstante, es el punto 7 del ABI en donde la UGT obtendría su mayor objetivo: “A los efectos de legitimar y reconocer la presencia de la UGT a nivel de empresa, CEOE manifiesta que, en las unidades de producción a través de ella representada, será reconocida y legitimada la presencia de un delegado de UGT”. Añadiendo a continuación:

«Los delegados sindicales de UGT podrán ser oídos por las empresas en el tratamiento y, en consecuencia, de aquellos problemas que afecten a sus afiliados y, en general, a los trabajadores; asistirán a los comités de empresa con voz y sin voto siempre que éstos, por mayoría, admitan su presencia, y servirán de instrumento de mediación y comunicación entre la UGT y las empresas».

No termina ahí el punto séptimo. Igualmente se podía leer: “Se procurará que los delegados de UGT sean miembros del comité de empresa, y en el supuesto de no serlo, les serán extendidas las mismas garantías que a estos efectos corresponden”. He aquí un *regalo empresarial* a la central ugetista, a valorar detenidamente ante las importantes contrapartidas –tanto políticas como económicas– que conllevaría.

Por lo demás, el ABI contenía un punto 14 en donde la CEOE se comprometía a garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, en caso de que las previsiones gubernamentales se vieran superadas. Es decir, estamos en la fórmula previa a la posterior “cláusula de revisión salarial”, sobre la que tantas batallas se desatarán en los inmediatos años. Ahora bien, por *poder adquisitivo* debía entenderse el cumplimiento de la política de congelación salarial decretada por el ejecutivo a través del RD-L 49/1978.

Rechazado de plano el ABI por parte de CCOO, quien convocaría un conjunto de movilizaciones en su contra; la misma central sindical duplicaría en los siguientes meses sus esfuerzos políticos y organizativos tanto en la calle como en los despachos en una situación de creciente deterioro económico. Exactamente esta misma cuestión sería el punto central del “II Acuerdo Interconfederal” entre CCOO y COPYME en donde se indicaba como “podemos calificar de emergencia” la situación económica. Un documento en donde se invitaba en su punto 2 a una “acción conjunta entre las pequeñas y medidas empresas y organizaciones sindicales de cara al Gobierno, para presionar en la adopción de soluciones concretas intentando unos amplios acuerdos entre las fuerzas políticas y sociales del país”. También se reclamaría que las organizaciones políticas y sociales intervinieran en el desarrollo de la “legislación económico-social”, empezando por el propio Estatuto de los Trabajadores (punto 4).

Puntos de acuerdo que serían desarrollados en el “III. Acuerdo Interconfederal” firmado por CCOO y CEPYME, el 30 de julio. Visto con la perspectiva necesaria aquel Acuerdo no sólo era más completo que el ABI en su vertiente política-normativa, sino que contenía un mayor número de propuestas concretas que el propio documento firmado entre UGT y CEOE. En especial, en lo relacionado con una serie de aspectos explícitamente omitidos. Es decir, se estaba ante lo más cercano a lo que, en breve, se consideraría como Acuerdo Interconfederal (AI). Por más que el mismo, a posteriori, no fuera desarrollado en todos sus puntos programáticos tampoco puede subestimarse su importancia histórica desde estos mismos puntos observados.

“Esto le da a la actual crisis un carácter no sólo coyuntural, sino estructural, agravada por la ausencia de un programa económico coherente, lo que nos coloca ante una situación de emergencia”. La anterior afirmación forma parte del primer párrafo del citado III Acuerdo Interconfederal. Todo un diagnóstico claro de la situación por la que se atravesaba la nación. De tal forma, que se “hace imprescindible buscar soluciones a dicha situación sobre la base de un

esfuerzo de solidaridad nacional y establecimiento de un plan a medio plazo (4 o 5 años) de reconversión nacional de la economía”, se continuaba remarcando.

Aquel documento firmado por CCOO y CEPYME puede dividirse en dos partes claramente diferenciadas. La primera, es un intento de ofrecer una respuesta integral al ABI. Así por ejemplo, se solicitaría la creación del Consejo Económico y Social: “CEPYME y la C.S. de CCOO consideran necesario como vehículo de participación efectiva de las fuerzas sociales en la reconversión económica, la creación y puesta en marcha del Consejo contemplado en el artículo 131 de la Constitución”. Además de reclamar también la participación en los diferentes órganos tripartitos de la Administración, en base a las recomendaciones y disposiciones de la OIT. Recogiéndose así también parte de los puntos del “Acuerdo de Base sobre Negociación Colectiva” de febrero de aquel mismo año.

Ahora bien, es en la segunda parte del documento en donde se trazan los puntos propios de un pre-acuerdo Interconfederal. De este modo, se plantean un conjunto de medidas destinadas a crear “al menos 300.000 puestos de trabajo anuales”, en donde se incluye desde la reforma de los mecanismos de protección a los parados, a bonificaciones a la PYME en el pago de la Seguridad Social, pasando por la reducción de la edad de jubilación, e incluso se llega a hablar de cómo el “Estado arbitrará los fondos necesarios para hacer frente a la financiación de estas medidas, que están destinadas a cubrir con jóvenes los puestos de trabajo vacantes”. Aquellos acuerdos no llegarían a afianzarse ni a desarrollarse ante la agitada y complicada segunda mitad del año 1979.

En uno de los *otoños más caliente* que se recuerde a la negociación del Estatuto de los Trabajadores, también se sumaría la negociación del Acuerdo Marco Interconfederal. Si antes indicábamos que el ABI ha sido mitificado, otro tanto sucedería con ET y por extensión con el AMI.

Así pues, la historia de la puesta en marcha del Estatuto de los Trabajadores ha pasado a englobar, de forma mayoritaria, uno de los capítulos de la transición a la democracia en su formato *edulcorado*¹⁵⁵. Tan *edulcorado* como *sectario* se podría añadir. En las muy escasas ocasiones en donde se ha realizado el habitual despliegue memorialístico, de forma sistemática las posiciones en su día mantenidas tanto por el PCE como por CCOO han desaparecido de los libros de homenaje, las exposiciones y las mesas redondas correspondientes¹⁵⁶. No faltan los ejemplos. Lo que por sí nos indica algo sustancial: sería precisamente la oposición comunista al ET, tanto en su vertiente política como sindical, el principal obstáculo del Gobierno de UCD para llevar a cabo su proyecto de ET, por más que gozará de una mayoría simple parlamentaria.

En todo caso, en mucho se vería facilitada su propuesta de ET ante los constantes enfrentamientos entre socialistas y comunistas en la negociación del mismo, tal y como sucedió en la Comisión de Trabajo en la sesión correspondiente del día 7 de septiembre. También aquí se frustraría la posibilidad de *unidad de acción* entre el PCE y el PSOE, por más que este último

¹⁵⁵ Véase lo apuntado al respecto en la *Presentación*. Y de forma concreta en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “El Movimiento Obrero en la España del tiempo vivido: del *sujeto político* al nuevo «precariado»” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y id. (coord.), *Manuel Tuñón de..., op.cit.*.

¹⁵⁶ En primer términos nos remitimos a la *Presentación*, *nota 147*. Dentro de los dos libros que allí se citan en el editado por la Fundación Francisco Largo Caballero, véanse los textos de, REDONDO, Nicolás, “Desde el 30º Congreso al Estatuto de los Trabajadores” (pp. 80-89); ZUFIAUR, José M^a, “El ABI: la primera manifestación de legislación laboral negociada en España” (pp. 90-106); y, MÁRQUEZ, Fabián, “Antecedentes del ET, El Acuerdo Básico Interconfederal. El «abuelo» de los acuerdos y el Estatuto de los Trabajadores” (pp. 108-125), todos ellos en, SARACÍBAR, Antón [et al.], *25 años del..., op.cit.*; y en el editado por el Ministerio de Trabajo: ZUFIAUR, José M^a, “Los contextos del Estatuto de los Trabajadores” (pp. 31-51); CALVO-ORTEGA, Rafael, “Una tarea difícil: el Estatuto de los Trabajadores” (pp. 203-218); y, SAGARDOY, Juan Antonio, “El porqué del Estatuto de los Trabajadores” (pp. 221-224), todos ellos en, RUESGA, Santos M., VALDÉS DAL-RÉ, Fernando y ZUFIAUR, José M^a (coords.), *Transformaciones laborales en..., op.cit.*.

partido –con el también apoyo crítico de UGT– llegara a presentar numerosas enmiendas¹⁵⁷. Un debate que estaría marcado no sólo por la crispación sino también por fuertes polémicas, debates y enfrentamientos doctrinales y políticos como otros pocos se recuerda. Finalmente el llamado “apoyo crítico” del PSOE a la redacción del ET –en su clásico discurso de la responsabilidad con la patria– serviría para que el Gobierno saliera indemne de un debate parlamentario que se prolongaría hasta el mes de febrero de 1980.

El *poder de la calle* era innegable en los tiempos de la transición postfranquista. Probablemente como en otros pocos periodos de nuestra historia. Las enseñanzas de las movilizaciones del primer trimestre de 1976, un año más tarde las producidas con respecto a la reivindicación de la amnistía; terminaría por generar un fuerte contestación social al Gobierno de UCD. Así se llegaría a un intenso punto de ebullición en el preciso momento en que se debatía –como no se cansaría de repetir Marcelino Camacho– la “Constitución de los Trabajadores” Y es este uno de los capítulos más *obviados* y *silenciados* de nuestra contemporaneidad reciente. La oposición en la calle y desde la calle, con el apoyo principal de los comunistas –tanto por parte del PCE como por CCCOO como por otras organizaciones de la izquierda radical– volverían a retomar un impulso sobresaliente, a partir de la propuesta de Ley de Acción Sindical en la Empresa del primer Gobierno democrático de Suárez. Rechazado de plano por considerarse un Ley que constreñiría gravemente la libertad de actuación de los sindicatos en los centros de empresa, y prácticamente hecho a la medida de los intereses de la patronal, desataría las protestas sindicales¹⁵⁸.

El texto contenía tales medidas regresivas que la siempre citada reforma sindical propuesta por el mismo Suárez significaba un retroceso notable en comparación con lo escasamente legislado. Al respecto no faltarían las movilizaciones, hasta que la Comisión de Trabajo del Congreso planteara un proyecto más *realista* ante la oposición sindical y política en la calle como en el mismo Congreso de los Diputados. He aquí otro de los *otros antecedentes olvidados*.

A *calentar* la calle contribuiría como otros pocos Fernando Abril Martorell. Primero ante el fracaso que representaría las conocidas como “jornadas de reflexión” en el otoño de 1978. Segundo, con el RD-L 49/1978 en donde lejos de *falsos dilemas* se implantaba por la vía de urgencia la congelación salarial. Y, en tercer lugar, ante la presentación del Programa Económico de UCD en abril, en donde se plantearía la tesis del “ajuste pasivo”¹⁵⁹. Ahora bien, sería especialmente a partir de la publicación en el BOE del RD-L 49/1978 cuando CCOO y UGT reaccionarían con la creación de una plataforma común –en donde se reclamaría un incremento salarial del 16%, junto con otras reivindicaciones– a la que se le acompañaría de numerosas movilizaciones. Coincidentes con las elecciones legislativas y municipales entre marzo y abril, serían las propias organizaciones obreras las que pararían –una vez más– la creciente radicalización obrera. “Pesaba la idea de que las «huelgas» en periodo electoral dan votos a la derecha”, ha llegado a señalar Agustín Moreno, dirigente histórico de Comisiones Obreras¹⁶⁰. Concluiría, de esta forma, un agitado primer trimestre en donde no se adivinaba todavía lo que sucedería en los siguientes meses.

Aprobado por el Consejo de Ministros el nuevo proyecto de ley del futuro ET el 1 de junio de 1979, la contestación obrera no tardaría en llegar. Prácticamente no había día ni semana sin huelga, ni paro o manifestación en aquel entonces. Principal aunque no únicamente de la

¹⁵⁷ Véase aquí, PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, *El PCE informa. El Estatuto de los Trabajadores. Debate en el Congreso*, Madrid, Comisión de Propaganda del PCE, 1979.

¹⁵⁸ Al respecto consúltese la obra colectiva de, ESPUNY TOMÁS, M^a Jesús y PAZ TORRES, Olga (coords. / eds.), *El Proyecto de Ley de Acción Sindical en la Empresa de 1978*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2005.

¹⁵⁹ Véase lo apuntado en la *nota 3*.

¹⁶⁰ MORENO, Agustín, “Prólogo” en COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos...*, *op.cit.*, p. 17.

mano de CCOO, la misma mostraría su absoluto rechazo por extender, entre otras cuestiones, la precariedad laboral y debilitar el también precario marco de negociación colectiva. Con el recuerdo vivo de lo que había sucedido con la primigenia Ley de Acción Sindical, las movilizaciones llegarían temprano. El 11 de julio se convocaría una jornada de movilización general con media hora de paro, en donde participarían dos millones y medio de trabajadores. Por este camino, se frenaría el intento de desmovilización que perseguía el ABI y que tanto ansiaba la CEOE y el Gobierno con la colaboración de la UGT.

Comisiones Obreras, primera fuerza sindical muy por delante de UGT –34% y 21% respectivamente en las elecciones sindicales de 1978¹⁶¹– llevaría prácticamente todo el peso de las movilizaciones durante los siguientes meses. *Luchas* que no terminarían ni comenzarían, de forma exclusiva, con el Estatuto de los Trabajadores. Así, por ejemplo, los frentes se irían agrandando, frente al nuevo intento de congelación salarial que se trataría de llevar a cabo RD 1955/1979, frente al proyecto de huelga impulsado por el Gobierno con el apoyo de la CEOE, o inclusive con la puesta en marcha del AMI que buscaba, nuevamente, afianzar a UGT sindicalmente. A todo ello se sumaría en el último trimestre del año la lucha de los estudiantes de enseñanza media y universitaria contra el Estatuto de Centros y la LAU del Gobierno de Suárez.

De esta forma, Comisiones Obreras iniciaría una fuerte campaña de movilizaciones que tendría su culmen el 14 de octubre, con una manifestación en la Casa de Campo de Madrid en donde se reuniría a más de 400.000 trabajadores. Toda una demostración de fuerza, de poder de convocatoria. Hasta tal punto de que la posibilidad de convocar una huelga general se llegaría a plantear con fuerza. Una *operación* que sería desactivada por los sectores carrillistas dentro de Comisiones Obreras y por el aparato del PCE en lo que se conoció popularmente como la jugada de la “Sota, Caballo y Rey”. Una decisión que crearía casi de inmediato una división, visible e invisible, entre ambas organizaciones, y que tendría su consiguiente correlato en las negociaciones del ET, pero sobre en el tipo de movilización por la que apuesta desde Comisiones Obreras en adelante, y que, en breve, generaría no pocas tensiones internas. De esta forma, como había sucedido en 1976 y parcialmente en la primavera de 1979, las tesis del equipo dirigente del PCE en consonancia con su propuesta de un Gobierno de concentración nacional, tumbarían la posibilidad de una huelga general contra el ET.

Por estos caminos delineados, el Partido Comunista de España se convertiría en un actor clave de la transición a la democracia por y a través de su papel de *estabilizador* de la situación socioeconómica. Si antes hemos advertido el *factor desmovilizador* de la UGT, sumado al *factor estabilizador* del PCE, bien se puede entender, buena parte de las cosas que evitaron una crisis política generalizada en aquel entonces, a partir de la posible convocatoria de una huelga general.

Pese a todo, las movilizaciones no se frenarían. Ahora bien, se atomizarían a nivel local y provincial. Aunque con importantes éxitos como la huelga en Granada o los paros de dos horas el 29 de noviembre de Madrid, la última oportunidad de convocar una huelga general que pudiera haber tumbado no tanto el Gobierno como sí el proyecto del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, no terminaría ahí la historia de las movilizaciones contra el ET. El 13 de diciembre en una doble movilización de estudiantes y trabajadores en la ciudad de Madrid, se producirían unos también desconocidos hechos luctuosos. Ambas movilizaciones que habían seguido itinerarios diferentes, en principio, iban a coincidir en la céntrica Ronda de Valencia. No sería así. El cordón de seguridad del PCE –principal aunque tampoco únicamente– impediría tal posibilidad, en una de las acciones de los comunistas españoles menos explicables de toda su reciente historia. A los pocos minutos de producirse tan significativo episodio, la policía realizaría más de 140 disparos hacia la manifestación de los estudiantes, llevándose la vida por delante de dos jóvenes estudiantes: José Luis Martínez y Emilio Montañés. Son los *muertos*

¹⁶¹ En el *anexo estadístico* véanse el *Gráfico 32* y la *Tabla 161*, al respecto.

olvidados del Estatuto de los Trabajadores. No serían aquellas los únicos heridos. Por cientos se pudieron contar en aquella y otras manifestaciones durante todos aquellos meses. La represión, control y encarcelamiento contra el movimiento obrero, incluido el estudiantil, seguía siendo una realidad social y policial. Como una realidad era la también constatada impunidad de los aparatos policiales.

A los sucesos del 13 de diciembre le seguirían no pocas manifestaciones de repulsa y diferentes acciones de lucha. Ahora bien, las principales movilizaciones contra el Estatuto de los Trabajadores concluirían ahí. Con dos muertos y no pocos heridos. No obstante, peores serían las heridas –visibles o no– que la recuperada estrategia de desmovilización “desde arriba” orquestada por el PCE, dejaría en el seno de la primera fuerza sindical. La calle perdía temporalmente así su poder de convocatoria, de presión, en medio de una división sindical que no haría sino agudizarse en los siguientes años.

Pero al mismo tiempo que sucedía todo lo anterior se pondría en marcha las negociaciones que conducirían al AMI. Cuando más acuciado estaba el Gobierno, en donde la posibilidad de iniciar un convenio-marco de cara a 1980 parecía más lejana, a lo que se sumaba las movilizaciones y huelgas en diferentes frentes; desde UGT se propondría un Acuerdo-Marco. Todo un mensaje de que lo que no podía alcanzar en la calle, en las asambleas, en los Comités de Empresas, lo pretendía volver a conseguir mediante un *acuerdo por arriba* con la CEOE en solitario. No tardarían tampoco en llegar en los enfrentamientos y los cruce de acusaciones entre CCOO y UGT. Estamos a mediados de octubre, hasta su firma definitiva pasarían cerca de dos meses.

El *efecto* del triunfo de las tesis carrilistas el 14 de octubre en la Casa de Campo supondría un alivio para no pocos sectores socialistas, pero sobre todo para el Gobierno y la patronal. Esta última cada vez más envalentonada llegaría decir por boca de Ferrer Salat: “O se firma el acuerdo [AMI] o nos cargamos a UGT”¹⁶². Una clara demostración de fuerzas a la par que de patente debilidad de UGT cada más aislada de la calle. Obtenido sus ansiadas reivindicaciones de cara al futuro ET, la central socialista pondría todo su empeño en obtener la hegemonía sindical a través de esta vía. A saber, la de los grandes pactos, que pudieran demostrar su responsabilidad con la salida económica frente al creciente supuesto radicalismo de CCOO. La estrategia no puede ser más afín a la patronal y el Gobierno, quien rápidamente atienden la llamada de UGT, ante la perspectiva de conseguir un acuerdo que garantice la paz laboral y a la par que consolide la división sindical. He aquí el trasfondo de la correlación de fuerzas que también ayuda a explicar los resultados finales del ET.

Comisiones Obreras pronto se descolgará de las negociaciones del AMI ante el cariz que estaba tomando la negociación. No sólo, se trataba, a su juicio, de que las bases del acuerdo contenían elementos regresivos en materia de derechos sociales, sino que además perpetuaba la congelación salarial. A partir de ahí, Comisiones Obreras todo lo confiaría en la negociación convenio por convenio. Tampoco habría muchas posibilidades a nivel estratégico, todo sea dicho. Igualmente, y por más que siguiera siendo la primear fuerza sindical como se demostraría durante el segundo trimestre de 1980 en las elecciones sindicales, el desgaste de tantos meses de movilización sumada a la división –cuando no el enfrentamiento– con el PCE, le pesaría factura en breve. A lo anterior, se sumarían las *derrotas* del Estatuto de los Trabajadores e inclusive de la Ley Básica de Empleo, junto con la constatación de que la permanente estrategia de movilización al tiempo que no conseguía resultados palpables, estaba *quemando* a sus cuadros, bases y afiliados. Por ello, en más de una ocasión se ha incidido en *los costes* de no firmar el AMI para CCOO. Todo un debate entonces y ahora dentro y en las proximidades de CCOO.

A fin de cuentas, el Acuerdo Marco Interconfederal inaugura –ahora sí– lo que entendemos por un AI. Se podrá discutir su naturaleza jurídica así como sus alcances políticos, pero no de su relevancia estrategia a nivel sindical de cara a afrontar la negociación colectiva en

¹⁶² Cita procedente de, MORENO, Agustín, “Prólogo” en COMISIONES OBREAS. SECRETARIA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos...*, op.cit., p. 19.

1980. De hecho, con la firma del AMI se inaugura la primera como efímera etapa de la concertación social en España que se puede extender hasta 1984/1986.

El AMI se convertiría también en el primer AI que se publicaría en el BOE, tras firmarse el 5 de enero de 1980¹⁶³. Todo un signo de la importancia que otorgaba al mismo el propio Ejecutivo en una maniobra no del todo “legalista”. Pronto USO se sumaría al mismo mediante un acta de adhesión, reforzando más su legitimidad político-sindical antes que estrictamente jurídica. Pero antes de entrar en dicho aspecto, los firmantes ya dejaron claro en las primeras del texto que un, “Acuerdo de esta naturaleza tiene un carácter excepcional en la negociación colectiva, excepcionalidad que viene dada por la grave crisis económica”. En clara referencia a que las reglas del juego de la negociación colectiva todavía no están dadas al no haberse aprobado el ET. Así se puede leer que otro de los objetivos es el “despejar el vacío y la incertidumbre que todavía pesan sobre el marco legal de las relaciones”. Menos razón les atendería a UGT y CEOE el afirmar que el ABI venía a abordar el “tema, tabú hasta el momento, de la productividad y el absentismo” –capítulo VIII. Productividad y absentismo–. El mismo ya había sido tratado en el “Acuerdo Base” de febrero de aquel mismo año.

Sin embargo, el AMI tenía un gran obstáculo: el tipo de naturaleza de tal acuerdo como avanzábamos. Un problema técnico-jurídico que tendrá su continuación en el AI’83 o el propio AES¹⁶⁴. En aquella ocasión se resolvería de la siguiente forma: “Las Organizaciones firmantes asumen las presentes estipulaciones y compromisos. En todo caso lo acordado tendrá naturaleza contractual, y, por tanto, generará obligaciones para ambas partes” (punto II). Es decir, el AMI no pasaba de ser un mero contrato. Lejos, por tanto, de la posibilidad de tener una *eficacia general* al no verse refrendado con la firma de Comisiones Obreras. Asimismo se establecía una “duración de dos años”.

Junto con asuntos que se habían tocado en el ABI –por ejemplo, “X. Mediación, Conciliación y Arbitraje” o “XI. De los Sindicatos y de los Comités de Empresa”– u otros relacionados con la necesidad de *racionalizar* la estructura de la negociación colectiva –incluyéndose de nuevo la “Cláusula de no violencia”–; el Acuerdo Marco Interconfederal consagraría la política de moderación cuando no de pérdida de poder adquisitivo. Y este sí que era un objetivo perseguido, buscado y deseado por el Ejecutivo y la CEOE. Así en su apartado “IV. Salarios”, establecía una banda de entre el 13% al 16% de revisión salarial bastante recortada –“V. Revisión Salarial”–. Por lo demás mantenía la misma jornada laboral, aunque incluía el tiempo de “el bocadillo” como tiempo de trabajo efectivo –“VI. Jornada”–. Uno de esos pequeños pasos a tener presentes.

Ahora bien, cuando se descende en los detalles concretos como, por ejemplo, el punto 3 del apartado “IV. Salarios” en donde se dice textualmente como los “porcentajes de incremento salarial [...] no serán de necesaria u obligada aplicación para aquellas empresas que acrediten objetiva y fehacientemente situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios de 1978 y 1979”, es cuando se entienden la firma de la CEOE con el apoyo del Gobierno. No sólo conseguía una vez más romper la unidad de acción de cara al siempre temido proceso de la negociación colectiva, que durante los primeros meses del año disparaba los índices de conflictividad; sino que conseguían atraer a la UGT en un acuerdo de mínimos sin grandes contrapartidas, y que además, introducía “temas tabús” –o mejor dicho potencialmente conflictivos– como el tema de la productividad, los excedentes empresariales o el absentismo. No era un mal acuerdo –desde la perspectiva patronal– en tanto venía a poner punto y final a uno de los años más duros, conflictivos y sangrientos de la transición a la democracia.

En 1981 el Acuerdo Marco Interconfederal sería revisado exclusivamente en su aspecto salarial, obviándose el resto de cuestiones. El año anterior la inflación terminaría cercana al límite máximo previsto: 15,6%, aunque se tienen presente otras desviaciones IPC así como los

¹⁶³ Véase lo apuntado en la *nota 144*.

¹⁶⁴ Nos remitimos aquí al apartado “12.2.5. El primer y el último acuerdo de la época socialista: análisis del Acuerdo Económico y Social”.

deflatores del consumo privado. Para 1981 se establecería un banda entre el 11 al 15%. Parecidos resultados se obtendrían al terminar el IPC con una elevación del 14,5%. La historia se volvía a repetir. La moderación salarial quedaba así consagrada, de forma definitiva, como la principal vía de actuación de las políticas liberales de UCD¹⁶⁵.

La publicación un viernes 14 de marzo de la Ley 8/1980 cerraba una intensísima etapa legislativa, política, social y laboral. En menos de cuatro años se había pasado del último intento reformista-garantista del franquismo paternalista a asentar las bases de la futura liberalización-flexibilización del SERL. De por medio se habían ensayado no pocas formulas de cara a asentar las reglas mínimas de una negociación colectiva por vías democráticas. Pero también aquel capítulo de la historia costaría no pocos muertos, heridos, encarcelados, procesados... en otra de las muchas posibles constataciones de que la transición no sería modélica ni pacífica.

Sin embargo, el legado –desde una perspectiva sindical– todavía se hacía más inquietante: la *unidad de acción* entre UGT y CCOO, clave en no pocas dimensiones no era viable ni posible, tal y como se evidenciaría en los siguientes años. En definitiva, se había recorrido a una velocidad sobresaliente –sin posibilidad de analizar detenidamente en su momento los pasos históricos que se estaban dando– la transformación del modelo de relaciones laborales en su proceso de democratización. Legalizados los sindicatos, aprobada la Constitución, realizadas las primeras elecciones sindicales en tiempos democráticos y otros tantos acontecimientos característicos de *los nuevos tiempos*, los mismos no podían ocultar, en cualquier caso, que la lógica flexibilizadora se iba imponiendo paso a paso.

9.3.2. De la aprobación del Estatuto de los Trabajadores al primer Gobierno socialista. *Rumbo fijo hacia la liberalización (marzo 1980-octubre 1982)*

Cuando se lee con sumo cuidado el artículo 35.2 de la Constitución –ya citado– lo que allí procede desarrollar es una Ley Ordinaria. Pero todavía más, pues, se presenta el asunto como un “hecho neutro”¹⁶⁶. Nada más lejos de realidad, cuando lo que estaba en juego era la normativa que iba a regular las siempre conflictivas relaciones capital-trabajo. Un espacio donde no cabe *neutralidad* posible.

La Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores* inaugura una larga etapa que se puede retrotraer a nuestro presente histórico vivo¹⁶⁷. Una trayectoria que no ha estado marcada, por la estabilidad. Pocas normativas, de hecho, han sido tantas veces revisadas. Como pocas otras normativas han generado tantos conflictos. De hecho, las críticas, los debates pero sobre todo los proyectos reformistas se han centrado, etapa por etapa, en ir limando el carácter protector y garantista –leído desde la óptica liberal-flexibilizadora– del ET. Sin duda, toda una labor de poda legislativa que iría limitando sus aspectos más progresistas y propiamente garantistas. Estamos, pues, ante las bases históricas de la “culto a la temporalidad”¹⁶⁸ o la “cultura de la flexibilidad”¹⁶⁹.

Una posible comparación entre el aquel texto y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los*

¹⁶⁵ Resolución de 12 de febrero de 1981, *del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, por la que se acuerda la publicación del texto revisado del Acuerdo Marco Interconfederal* [B.O.E. 25 de enero de 1981]; y, Resolución de 8 de abril de 1981, *del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, por la que se hace público el acuerdo concretado entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Unión Sindical Obrera, para la revisión salarial de 1981, dentro del Acuerdo Marco Interconfederal*.

¹⁶⁶ CASAS BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y..., *op.cit.*, p. 324.

¹⁶⁷ Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

¹⁶⁸ VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, *Las relaciones laborales...*, *op.cit.*, 32.

¹⁶⁹ BARBAGELATA, Héctor-Hugo, “El advenimiento del..., *op.cit.*, p. 500.

Trabajadores hoy vigente, nos daría cuenta de la profunda metamorfosis del SERL en su conjunto¹⁷⁰. También se puede advertir el más que considerable consenso partidista entre las dos grandes fuerzas políticas del país –al igual que ha sucedido con las líneas de política económica– en este preciso campo.

Transitaremos en este epígrafe una etapa que ocupa entre marzo de 1980 a diciembre de 1982. Al igual que viéramos para los años anteriores, esta fase va a seguir caracterizándose por la provisionalidad y por la enorme multitud de medidas legislativas. Hasta en nueve ocasiones se publicarán en el BOE sendos Reales Decretos estableciendo medidas relativas a la contratación temporal. Prácticamente, el doble que entre 1976 a 1980. Ello en un momento en que la crisis del petróleo de 1979 hace sus principales estragos en materia de destrucción de empleo como tiempo tendremos de examinar.

En este periodo de tiempo, la contratación temporal va a cobrar un protagonismo central e inédito. Así su progresiva extensión se va a convertir en una de las principales vías de movilización por parte de las principales fuerzas sindicales. Pero a su vez, la realidad política espoleada por el *shock* del 23-F de 1981 va a conllevar, una vez más, una nueva automoderación en el nivel de protestas ante la grave situación de inestabilidad política generada. Hasta tal punto, que los sindicatos llegarían a negociar en secreto –a través de unas cláusulas confidenciales– en el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) medidas relativas a la contratación temporal –exigidas por el Gobierno de Calvo-Sotelo en una nueva vuelta de tuerca a la flexibilidad– con el objetivo de no verse perjudicadas tanto a nivel de imagen como políticamente ante sus propios afiliados y por el conjunto de la clase trabajadora. Todo un signo de la cada vez más extendida opinión negativa en torno a la contratación temporal.

Tampoco faltarán los conflictos, previo rechazo frontal, en torno a la Ley Básica de Empleo, que va a recortar de forma sobresaliente las ya de por sí pobres prestaciones por desempleo en un momento económico crítico, en donde cada día prácticamente se destruirían más de 1.000 empleos diarios. En suma, nos internaremos en la segunda y última fase política de los ejecutivos centristas, en donde es palpable su cada vez más aguda política liberal y antisocial.

Sin *preámbulo* ni *Exposición de Motivos*, la Ley 8/1980 asentará las bases legislativas de un SERL prácticamente democrático¹⁷¹. En el terreno en que nos movemos, el primer cambio que se formula con el ET es en relación a la nueva concepción de la política de empleo. Se pasa de una *lectura* que en la práctica tan sólo se preocupa por los contratos de trabajos formulados, y que, por tanto deja en un plano secundario al resto de circunstancias que interactúan en el mercado de trabajo, a una nueva situación en donde,

«el Derecho del Trabajo está deviniendo un derecho del empleo, que en su regulación ha de tener también en cuenta a los no empleados, a los efectos de aquella en el mercado y, las exigencias de ese mercado facilitando y no obstaculizando la contratación de trabajo»¹⁷².

¹⁷⁰ Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores* [B.O.E. 29 de marzo de 1995].

¹⁷¹ Un completo estudio sobre el inicial desarrollo reglamentario del ET en todas sus vertientes entre 1980 y 1982, se puede encontrar en: PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel-Carlos, “El desarrollo reglamentario del Estatuto de los Trabajadores (1980-1982)”, *Revista de Política Social*, nº 137, (1983), pp. 9-30.

¹⁷² RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “La contratación temporal en la Ley 32/1984 y en los decretos de desarrollo” en id. (coord.), *Comentarios a la nueva... op.cit.*, p. 85-115. Todo este proceso ocasionara con el paso del tiempo una *reducción de las garantías individuales laborales*, tal y como explicarían en su día. CASA BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y... op.cit., p. 325. Como ha indicado, por su parte, Antonio Martín Valverde la clave de la flexibilización que se establece la Ley 8/1980 se encuentra en la «reordenación de las fuentes de producción normativa», así como «en la reducción sensible del acervo del ‘derecho necesario’ que han

La voluntad del legislador en relación a la liberación y flexibilización del ordenamiento jurídico a través del ET es palpable. Aunque el Estatuto de los Trabajadores no consagra directamente un *salto adelante* –tanto a nivel cualitativo como cuantitativo– este se producirá por medio de su desarrollo legislativo en los siguientes años. En todo caso, las bases del desarrollo quedan ahí establecidas por medio del artículo 11¹⁷³, el artículo 12¹⁷⁴, el artículo 15¹⁷⁵, el artículo 17.3¹⁷⁶, el artículo 49¹⁷⁷, el artículo 51¹⁷⁸ o del artículo 53¹⁷⁹, entre otros

supuesto su entrada en vigor». MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la..., op.cit.*, p. 27). De muy similar opinión sería el propio Fernando Valdés Dal-Ré, al advertir como «esta reforma, por lo pronto, proseguirá en la disminución del tono protector de la relación laboral, introduciendo medidas flexibilizadoras que alcanzan a la totalidad de los aspectos sustantivos de esa relación. La flexibilidad deja de ser una política concebida para operar básicamente en el momento de la contratación para pasar a difundirse y dispersarse, con mayor o menor intensidad, en todas las secuencias de la vida del contrato, señaladamente durante la fase de ejecución». Todo ello para concluir con la siguiente rotunda valoración a la de concretar el impacto real de la RET’84 y señalar como con la misma se llevaría a cabo «una labor de poda de una parte nada desdeñable del patrimonio normativo garantista con vistas a facilitar una gestión y administración más flexible de la mano de obra». VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, *Las relaciones laborales..., op.cit.*, p. 32.

¹⁷³ «11. Trabajo en prácticas y para la formación. 11.1. Quienes estuvieran en posesión de titulación académica, profesional o laboral reconocida, dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la obtención de aquélla, pueden concertar contrato de trabajo en prácticas a fin de perfeccionar sus conocimientos y adecuarlos al nivel de estudios cursados por el interesado [...]. 11.5. Los mayores de dieciséis años podrán ser contratados, a efectos de formación laboral, hasta el cumplimiento de la edad de dieciocho años con reducción de jornada, de la correspondiente retribución y de la cotización a la Seguridad Social. En el supuesto de incorporación del interesado a la empresa sin solución de continuidad, se estará a lo dispuesto en el número anterior». Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

¹⁷⁴ «12. Trabajo a tiempo parcial. El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste sus servicios durante un determinado número de días al año, al mes o a la semana, o durante un determinado número de horas, respectivamente inferior a los dos tercios de los considerados como habituales en la actividad que se trate en el mismo período de tiempo». Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

¹⁷⁵ «15. Duración del contrato. 15.1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. No obstante, podrán celebrarse contratos de trabajo de duración determinada: a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de obra o servicio determinados; b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas, exceso de pedidos o razones de temporada así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, el contrato tendrá una duración máxima de seis meses dentro de un período de doce meses y deberá expresarse causa determinante de su duración; c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de la sustitución; d) En atención a las circunstancias previstas en el apartado tres del artículo diecisiete, cuando el Gobierno haga uso de la autorización prevista en el mismo; e) Cuando se trate de trabajos fijos y periódicos en la actividad de la empresa, pero de carácter discontinuo. Los trabajadores que realicen tal actividad deberán ser llamados cada vez que vaya a realizarse y tendrán la consideración, a efectos laborales, de fijos de trabajos discontinuos. 15.2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, siempre que hubiera transcurrido un plazo igual o superior al periodo de prueba establecido para la actividad de que se trate. Todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar en derecho, salvo que de la propia naturaleza de la actividad o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración temporal de los mismos. 15.3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de Ley. 15.4. Los contratos temporales se prorrogarán, por el tiempo que se determine mediante Decreto, previa consulta al Consejo General del INEM, y atendiendo a la situación del mercado de trabajo y a la evolución del nivel de empleo». Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

¹⁷⁶ «17. No discriminación en las relaciones laborales. 17.3. Tres. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Gobierno podrá regular medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo, que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores de edad avanzada, con capacidad laboral

disminuida, desempleados y de quienes accedan al primer empleo. Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones y otras ayudas para fomentar el empleo de los grupos de trabajadores citados en el párrafo anterior. Cuando se utilice la contratación temporal como medida de fomento al empleo, la duración del contrato no podrá exceder de tres años. Las medidas de fomento al empleo integradas por subvenciones, desgravaciones y otras ayudas se establecerán por el Gobierno previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas». Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

¹⁷⁷ «49. Extinción del contrato. El contrato de trabajo se extinguirá: 49.1. Por mutuo acuerdo de las partes. 49.2. Por las causas consignadas válidamente en el contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario. 49.3. Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. Si llegado al término no hubiera denuncia por alguna de las partes, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación. Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de quince días [...]. 49.9. Por cesación de la Industria, comercio o servicio de forma definitiva, fundada en causas tecnológicas o económicas, siempre que aquella haya sido debidamente autorizada conforme a lo dispuesto en esta Ley [...]. 49.11. Por despido del trabajador. 49.12. Doce. Por causas objetivas legalmente procedentes». Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

¹⁷⁸ «51. Extinción por causas tecnológicas económicas y fuerza mayor. 51.1. La existencia de fuerza mayor, para que produzca la extinción de las relaciones de trabajo, habrá de ser constatada por la autoridad competente [...]. 51.2. La extinción de las relaciones de trabajo fundada en causas económicas o en motivos tecnológicos deberá ser autorizada por la autoridad competente a petición del empresario interesado. Los trabajadores, a través de sus representantes, podrán solicitar la autorización si racionalmente se presumiera que la no incoación del expediente por el empresario pudiera ocasionarles perjuicios de imposible o difícil reparación. 51.3. El empresario, salvo en los casos previstos en el apartado uno de este artículo, estará obligado a abrir un período de treinta días naturales de discusión y consultas con los representantes legales de los trabajadores, a los que se facilitan la información y documentación acreditativa del expediente pudiendo éstos constituirse como interesados en la totalidad de la tramitación del mismo. 51.4. El empresario notificará a la autoridad laboral competente copia de la comunicación entregada a los representantes legales de los trabajadores, así como la fecha de inicio de las consultas. 51.5. Concluido el período consultivo con acuerdo de las partes, se comunicará éste a la autoridad laboral, quien en el plazo de quince días determinará, oída la correspondiente Entidad Gestora de la prestación por desempleo, sin más trámite, la extinción; si durante este período de tiempo la autoridad laboral no se pronunciase expresamente, se entenderá autorizada la extinción [...]. 51.9. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo. 50.10 Diez. La indemnización, en el supuesto de ser autorizada la extinción, será de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades». Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

¹⁷⁹ «53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas. 53.1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige la observancia de los requisitos siguientes: a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa; b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades; c) Concesión de un plazo de preaviso cuya duración computada desde la entrega de la comunicación personal hasta la extinción del contrato de trabajo habrá de ser, como mínimo, la siguiente: — Un mes, para los trabajadores cuya antigüedad en la empresa sea inferior a un año; — Dos meses, cuando la antigüedad sea superior a un año y no alcance a dos; — Tres meses, cuando la antigüedad sea de dos o más años [...]. 53.3. Contra la decisión extintiva podrá recurrir como si se tratase de despido disciplinario. 53.4. Cuando el empresario incumpliese los requisitos establecidos en este artículo, la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio. 53.5. La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, procedencia a improcedencia de la decisión extintiva producirá iguales efectos que los indicados para el despido disciplinario, con las siguientes modificaciones: a) En caso de procedencia, el trabajador consolidará la indemnización recibida y se entenderá en situación de desempleo por causa a él no imputable; b) Si la extinción se declara improcedente y el empresario procede a la readmisión, el trabajador habrá de reintegrarle la indemnización percibida. En caso de sustitución de la readmisión por compensación económica se

muchos. Pero como decíamos, visto con la perspectiva necesaria, se conservan todo un conjunto de garantías y preceptos. Observemos, pues, su contenido así como su posterior desarrollo.

En relación a los mecanismos de entrada y de permanencia, el artículo 15 mantiene –al igual que las normativas predecesoras empezando por la LRL– la presunción por la contratación de duración indefinida¹⁸⁰: “El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido”. Será, justamente, este el punto de arranque sobre la que se centrarán, en adelante, todas y cada una de las reformas laborales. A pesar de que el texto original no se va a tocar durante un largo tiempo¹⁸¹, se procederá en el siguiente sentido: ir vaciando de contenido jurídico el mismo a través de la progresiva ampliación jurídica de las posibilidades de contratación temporal. En gran medida, el artículo 15 como sucede con el artículo 35 y/o el artículo 37 de la CE, se quedará en buen propósito antes que en una realidad efectiva. Tan sólo hace falta repasar las diferentes *Exposiciones de Motivos* de las siguientes reformas laborales o detenerse en los objetivos que se marcarían los diferentes ejecutivos en estos últimos años. En todos y cada uno de los casos, cada reforma del ET por más que introdujera mayores dosis de flexibilidad, siempre mantenía con fin último conseguir y garantizar el empleo estable y por supuesto caminar hacia el otro punto utópico: el pleno empleo.

Así pues, con el ET se va a institucionalizar definitivamente las dos vías clásicas de contratación temporal: la causal y la de fomento del empleo. La primera sería a través del desarrollo del artículo 15. El menú de contratación temporal que ahí se establece, refleja la evolución normativa que se había seguido desde la aprobación de la LRL y las posteriores *cuñas flexibilizadoras*. Aunque no es ni viable ni aconsejable *comparar* una norma pre-constitucional con una democrática, un posible acercamiento indica, una vez más, el tipo de voluntad que acompañaría en cada ocasión al legislador. En cualquier caso, destaca el hecho de que no se contemplan ni ordenanzas laborales ni autorizaciones legales a la hora de hablar de la contratación temporal. Por ejemplo, en el punto a) del artículo 15.1 –“Cuando se contrate al trabajador para realización de obra o servicio determinados”– desaparecen todas las trabas en cuanto a límites máximos e indemnizaciones. Pero todavía más interesante es observar el muy imponente artículo 15.1a):

«Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas, exceso de pedidos o razones de temporada así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, el contrato tendrá una duración máxima de seis meses dentro de un periodo de doce meses y deberá expresarse causa determinante de su duración».

Nos encontramos en este mismo artículo con una de las fórmulas fundamentales del avance de la flexibilización de las relaciones laborales: “aún tratándose de la actividad normal de la empresa”. Vía central de la futura universalización (democrática) de la contratación temporal. Además, la primera parte tampoco deja dudas del citado avance, al establecer cuatro muy flexibles formulas que en manos del empleador –acompañado de un buen asesor jurídico– pudieran dar un amplio juego. También se observa como se trata de mantener un cierto equilibrio formal al limitarse su posible utilización para un periodo de 12 meses dividido en dos de 6 meses. *Formal*, en el sentido, de que tan sólo se tiene que ir al punto 15.4 para leerse: “Los contratos temporales se prorrogarán, por el tiempo que se determine mediante Decreto, previa consulta al Consejo General del INEM, y atendiendo a la situación del mercado de trabajo y a la evolución del nivel de empleo”.

deducirá de ésta el importe de dicha indemnización». Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

¹⁸⁰ Nos remitimos aquí al detallado estudio al respecto presentado en su día, MARTÍNEZ EMPERADOR, Rafael, *Estabilidad en el...*, *op.cit.*.

¹⁸¹ La modificación sustancial del mismo vendrá de la mano del RD L 1/1995 en donde se cambia la redacción por la siguiente: «El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indefinido o por una duración determinada». Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores*.

Se indica, asimismo, en el artículo 15.1d) lo siguiente: “En atención a las circunstancias previstas en el apartado tres del artículo diecisiete, cuando el gobierno haga uso de la autorización prevista en el mismo”. Lo que nos conduce a la segunda vía de la contratación temporal contemplada en el ET. Incluido en la “Sección II. Derechos y deberes derivados del contrato” precisamente el artículo 17.3 va a venir a otorgar al Gobierno todo un amplio mandato para gestionar prácticamente a su antojo, todas las medidas que más adelante se conocerán como de fomento del empleo. Una de las más importantes novedades en términos jurídicos del ET, no tanto por lo que se viene a contemplar sino por su juridificación.

«17.3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Gobierno podrá regular medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo, que tengan por objetivo facilitar la colocación de trabajadores de edad avanzada, con capacidad laboral disminuida, desempleados y de quienes accedan al primer empleo

Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones y otras ayudas para fomentar el empleo de los otros grupos de trabajadores citados en el párrafo anterior. Cuando se utilice la contratación temporal como medida de fomento al empleo, la duración no podrá exceder de tres años».

Quedan, así, contemplados un concreto grupo de colectivos sobre los que concentrará la contratación temporal como medida de fomento del empleo, con tan sólo una limitación temporal máxima –bastante generosa de 3 años– y sin establecer ningún tipo de limitación mínima. La flexibilización es patente tanto en relación a los mecanismos de entrada como en lo relativo a las subvenciones, estableciéndose como requisito –y no como ningún tipo de limitación y/o obligación– el hecho de “previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”¹⁸².

Se avanzará también notablemente en la adaptación normativa –también en el sentido flexibilizador– en relación a lo que, ahora sí, ya se denomina el “Trabajo en prácticas y para la formación” (artículo 11). Mecanismo clave para la contratación común del colectivo juvenil, en el que diferencian y se parcelan ambas modalidades de forma más sistémica. Se borra aquí cualquier tipo de concepción paternalista, pero también, en la práctica, todos los límites que había establecido la LRL y que se habían sido eliminados a través de las diferentes “cuñas flexibilizadoras” hasta su práctica universalización. De esta forma, en el artículo 11.1 se señalaba: “Quienes estuvieran en posesión de titulación académica, profesional o laboral reconocida, dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la obtención de aquella, pueden concertar contrato de trabajo en prácticas a fin de perfeccionar sus conocimientos y adecuarlos al nivel de estudios cursados”. Aquí como viéramos anteriormente se obvia cualquier tipo de referencia al límite mínimo estableciéndose tan sólo que el contrato “no podrá ser superior a doce meses en total” (artículo 11.3.). También en relación a los contratos para la formación se produce una ampliación fáctica de la utilización de dicha fórmula, sin ningún otro requisito más que el siguiente: “Los mayores de dieciséis años podrán ser contratados, a efectos de formación laboral, hasta el cumplimiento de dieciocho años”, con las correspondientes reducciones y baremos de cara a la cotización a la Seguridad Social (artículo 11.5).

Se configuran así dos formulas que pese a la loable voluntad del legislador de evitar su posible mal empleo, posteriormente, serían instrumentalizadas por los empleadores como un mecanismo de reducción de costes laborales cuando no de sustitución de fijos por temporales, como no se cansarían en denunciar los sindicatos.

Ya habíamos visto como en el RD-L 49/1978 en su artículo 7 se hablaría de la posibilidad de poner en marcha el contrato experimental a tiempo parcial. Nunca se llegaría a desarrollar reglamentaria por las razones que también se dejaron apuntadas. Así pues, es con el ET cuando se pretende legislar acerca del contrato a tiempo parcial a través del artículo 12. Todo un mensaje de adaptación al entorno europeo, en donde esta figura llevaba años legislada y con un uso cada vez más creciente. Ahora bien, se pueden seguir detectando las dudas acerca de la voluntad real del legislador en tanto se limita una definición genérica sin mayores

¹⁸² Véase aquí un apunte-jurídico técnico en Capítulo 7, *nota 754*.

precisiones, o sin aclarar tampoco, por ejemplo, si se trata de un contrato de duración determinada o temporal¹⁸³. Dudas y limitaciones todavía más considerables cuando se procede a interpretar la *Disposición Transitoria 2*:

«A efectos de lo dispuesto en los artículos 12 y treinta y seis cuatro, en tanto persistan las actuales circunstancias de empleo, sólo pueden contratarse a tiempo parcial los trabajadores perceptores de prestación de desempleo; los que hubieran agotado la percepción de la misma, continuando en situación de desempleo; los trabajadores agrarios que hubiesen quedado en desempleo, y los jóvenes menores de veinticinco años».

Por esta misma vía, el contrato a tiempo parcial se termina concibiendo como un mecanismo exclusivamente destinado, en un principio, a la situación de crisis económica y limitado a un conjunto de colectivos concretos. No obstante, en ese mismo párrafo aparece otra de las “fórmulas” centrales para justificar, en adelante, la expansión fáctica de la contratación temporal: “en tanto persistan las actuales circunstancias de empleo”.

El *menú* de la contratación temporal presentado en el ET, conllevará, pues, a una expansión fáctica, aunque todavía con determinadas reticencias legislativas, que son, a su vez, expresión de una concreta mayoría parlamentaria a la par que de una determinada correlación de fuerzas capital-trabajo.

Con respecto a los mecanismos de salida, el Estatuto de los Trabajadores consolida un amplio repertorio en donde se consagra, en la práctica del día a día, el “despido libre” aunque no gratuito. Un terreno sobre el que los diferentes ejecutivos de UCD habían venido profundizando considerablemente, a través de diferentes medidas consideradas como todo un ataque sindical a los derechos del trabajador más básicos. El artículo 49 –y siguientes que conforman parte del “Capítulo III. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo”– viene a asentar hasta una docena de causas de extinción de contrato. Desde el despido por obra o servicio (artículo 49.3), pasando por causas tecnológicas o económicas (artículo 49.9) hasta las siempre citadas “causas objetivas” (artículo 49.12), el menú posible para el despido es sobresaliente. Como también es sobresaliente el recorte de garantías y derechos en perspectiva comparada con la LRL. Así pues, los siempre citados *regalos empresariales* de los diferentes gobiernos de Suárez cobran entidad de Ley.

Aunque otras tantas cuestiones se podían destacar al respecto de la aprobación del ET, nos conformaremos en resaltar algunos de sus artículos, cuyas propuesta de reforma y modificación llegarían a acaparar la agenda política del Gobierno, los partidos políticos y los agentes sociales en poco tiempo. Más allá de consolidar derechos tan básicos como garantizar la edad mínima de acceso al trabajo en los 16 años (artículo 6), también se prohibían las “agencias privadas de colocación” (artículo 16) –lo que en el futuro se conocerán como las ETT’s, motivo central de parte de la reforma laboral de 1994– así como la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de los Trabajadores que obligaba a ir sustituyendo las antiguas Ordenanzas Laborales. Pero sobre todo, nos interesa destacar un conjunto de artículos que también serían objeto de un intenso debate político a la par que doctrinal. Ahí están el artículo 33 –Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)– el artículo 34 y el artículo 38 relativos a la jornada laboral –establecida en 43 días a la semana de media– y las vacaciones anuales –en donde el mínimo fijado era de 23 días–. Precisamente sobre estos tres artículos en no menos de un lustro se centrará buena parte de la atención sindical y mediática. No se puede, por último, concluir este breve y sintético repaso por el ET sin atender a lo que se establece en el “Título II De los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa”. Título redactado a imagen y semejanza del ABI.

¹⁸³ «Artículo 12. El trabajador se entenderá contrato a tiempo parcial cuando preste sus servicios durante un determinado número de días al año, al mes o la semana, o durante un determinado número de horas, respectivamente, inferior a los dos tercios de los considerados como habituales en la actividad que se trata en el mismo período de tiempo. La cotización a la Seguridad Social se efectuará a razón de las horas o días realmente trabajados». Ley 8/1980, de 10 de marzo, *del Estatuto de los Trabajadores*.

Durante el primer año el Estatuto de los Trabajadores, en concreto, hasta el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, estaría marcado por el desarrollo de la Ley Básica de Empleo antes que por la cuestión de la contratación temporal. Se asiste, así, a una fase caracterizada por una relativa ralentización de la normativa de la contratación temporal hasta las negociaciones que conducirían a la firma del ANE.

Lo anterior, no va a significar mayor estabilidad política y jurídica. Desde marzo de 1980 a diciembre de 1982 van a pasar por el Ministerio de Trabajo hasta cinco titulares: Rafael Calvo Ortega (febrero 1980-mayo 1980); Salvador Sánchez Terán (mayo 1980-septiembre 1980), Félix Manuel Pérez Miyares (septiembre 1980-febrero 1981), Jesús Sancho Rof (febrero 1981-diciembre 1981) y Santiago Rodríguez Miranda (diciembre 1981-diciembre 1982). Así pues, algunos ministros como Sánchez Terán o Pérez Miyares no estarán al frente de sus respectivas carteras ni seis meses. Una sucesión de diferentes responsables que evidencian la descomposición gubernamental así como la falta de cualquier tipo de planificación económica y laboral a corto plazo. En paralelo, hasta tres hombres fuertes de UCD estarán, en la práctica, al mismo tiempo en las principales carteras económicas en buena parte de este periodo que no llega a los dos años en su totalidad: Fernando Abril Martorell como Ministros de Asuntos Económicos (abril 1979-septiembre 1980) siendo sustituido por Leopoldo Calvo-Sotelo (septiembre 1980-febrero 1981); al mismo tiempo al frente del Ministerio de Economía estaría José Luis Leal Maldonado (6 de abril-diciembre 1980) para ser reemplazado en diciembre de 1981 por Juan Antonio García Díez al frente de Economía y Comercio. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda –posteriormente anexionado a Economía en tiempos de Boyer– será uno de los que mayor estabilidad goce con Jaime García Añoveros durante más de tres años (abril 1979-diciembre 1982).

Las preferencias pero sobre todo las urgencias legislativas del Gobierno de UCD que tan sólo entre el mes de marzo al mes de octubre de 1980 –fecha de la aprobación de la Ley Básica de Empleo o el RD 2303/1980– a ver pasar tres Ministros de Trabajo es obvia: mejorar y ampliar las posibilidades del despido, tanto en cuanto a la rapidez de los trámites administrativos como en cuanto a su coste, lo que conllevaría, a su vez, una reducción notable de los derechos económicos en relación a la protección por desempleo. En suma, se pretendió facilitar –o si se prefiere *ajustar*– el proceso de destrucción de empleo desde la óptica empresarial. De esta forma, los primeros pasos legislativos del ET –junto con alguna que otra medida que hoy sería calificada simplemente de machista y retrograda¹⁸⁴– tienen en el Real Decreto 696/1980, de 14 de abril, *para la aplicación del Estatuto de los Trabajadores a los expedientes de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y de suspensión y extinción de las relaciones de trabajo* su primera plasmación práctica¹⁸⁵.

«Lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores [...] requiere fijar las normas sobre la sustanciación del procedimiento correspondiente, a cuya finalidad responde el presente Real Decreto, cuyas normas se inspiran en los postulados de economía procesal, rapidez y eficacia social, sin perjuicio de las plenas garantías reconocidas a los trabajadores y a los empresarios, en cuanto titulares de los derechos a intereses en concurrencia en estos expedientes».

Como argumento técnico la propia *Exposición de Motivos* del RD 696/1980 dejó bien claro hacia donde se dirigía la funcionalidad del mismo: facilitar al máximo los Expedientes de Regulación de Empleo. Todo su Capítulo II y su Capítulo III van orientados en tal dirección: abaratar las posibles indemnizaciones (artículo 7). Lo que junto con el artículo 19 relativo al pago del FOGASA y de los salarios de tramitación vendrán a constituirse en uno más de las y mejores regalos empresariales” de la UCD a la *causa empresarial*.

¹⁸⁴ Por ejemplo, Real Decreto 723/1980, 11 de abril, *sobre promoción del empleo de la mujer con responsabilidades familiares* [B.O.E. 23 de abril de 1980].

¹⁸⁵ Decreto 696/1980, de 14 de abril, *para la aplicación del Estatuto de los Trabajadores a los expedientes de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y de suspensión y extinción de las relaciones de trabajo* [B.O.E. 17 de abril DE 1980].

Pocas o ninguna queja pudieron llegar a tener también la clase patronal española con la Ley 51/1980, de 8 de octubre, *Básica de Empleo* en especial con el Título II y su Título III¹⁸⁶. Esta normativa, cuya segunda parte será ampliamente revisada por los gobiernos socialistas, contiene en su primera parte los preceptos básicos de la concepción de la política de empleo naciente del ET. Así en su “Título preliminar” plantea la siguiente definición:

«Artículo 1. Concepción

Uno. La política de empleo es el conjunto de decisiones que tienen como finalidad esencial la consecución del equilibrio a corto, medio y largo plazo, entre la oferta y la demanda de trabajo, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, así como la protección de las situaciones de desempleo.

Dos. Las medidas de política de empleo previstas en la presente Ley se adoptarán en el marco de la política económica del Gobierno, de forma que permitan conseguir y mantener el nivel de pleno empleo, mejorar la estructura ocupacional y fomentar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo».

Por otra parte, el “Título I. Del fomento del empleo” no dejaría de ser otro amplio epígrafe repleto de buenas declaraciones en el que se especifican multitud de aspectos: desde la política fiscal al empleo (artículo 9), los grupos específicos de trabajadores (artículo 10)– “especialmente los jóvenes demandantes de primer empleo, trabajadores perceptores de las prestaciones de desempleo, mujeres con responsabilidades familiares, trabajadores mayores de cuarenta y cinco años de edad y minusválidos”– a las diferentes ayudas a las empresas que contrataran trabajadores desempleados (artículo 12). Incluso se llega a definir con precisión lo que se entiende por “Fomento del empleo juvenil” (artículo 11).

«A los efectos de la presente Ley se entenderá por ‘jóvenes demandantes de primer empleo’ aquellas personas cuya edad esté comprendida entre dieciséis y veintéis años, o hasta veintiocho años, si fueran titulados superiores, inscritos en las Oficinas de Empleo y que, con anterioridad, no hayan realizado actividad profesional como trabajadores por cuenta ajena o autónomos».

Ahora bien, será el “Título II. De los sistemas de protección por desempleo” el que generará el gran rechazo sindical y político de aquel momento. Aunque en el Capítulo 8 ya se advirtió de sus perniciosos efectos en descenso de cobertura, no está de más que, de forma breve, se repasen sus principales artículos al respecto¹⁸⁷. De esta forma, en primer lugar, nos hemos de detener en el artículo 19 sobre “Duración de la prestación” que va a conllevar una reducción sobresaliente del tiempo de derecho de la prestación por desempleo; en artículo 20 relativo a la cuantía de la prestación también producirá una considerable reducción; e igualmente en el artículo 22 se presentan, a través de unos límites muy severos, el disfrute de las prestaciones así como la posible pérdida de tal derecho. Y otro tanto sucede cuando nos aproximamos al “Capítulo III. Prestaciones complementarias” en donde las baremos que se manejan conducen a establecer límites cercanos a la subsistencia.

Lo anterior todavía se va a ver más endurecido a los seis meses, cuando se va publicaría en el BOE el Real Decreto 920/1981, de 24 de abril, *por el que se aprueba el Reglamento de Prestaciones por Desempleo*¹⁸⁸. La *ofensiva liberal*, en este terreno, ofrece pocas dudas: una reducción *neta* y *real* de las prestaciones por desempleo, que llegaría a marcar records absolutos, en términos negativos, en una situación, además, marcada por una creciente exclusión y marginación de amplios sectores asalariados.

¹⁸⁶ Ley 51/1980, de 8 de octubre, *Básica de Empleo*. Sobre el desarrollo y efectos de la citada normativa, nos remitimos a lo apuntado en el apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

¹⁸⁷ Véase la *nota 186*.

¹⁸⁸ Real Decreto 920/1981, de 24 de abril, *por el que se aprueba el Reglamento de Prestaciones por Desempleo* [B.O.E. 23 de mayo de 1980].

Por lo demás, con no pocas dudas de entrada, se va a legislar en torno a la contratación temporal. A poco de estrenar el cargo Félix Manuel Pérez Miyares va a desarrollar la contratación temporal en su vía común y/o causal, a través del Real Decreto 2303/1980, de 17 de octubre, *sobre aplicación del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación temporal*¹⁸⁹. Un intento más *teórico* que *real* de desarrollar el artículo 15 del ET. Decimos teóricamente ya que a pesar de hablar de cómo se “necesitan de ciertas precisiones para su más exacta utilización”, lo que nos encontramos es con una normativa en donde predomina lo que bien se pudiera denominar la “indefinición programada”. Pero, de cualquier de las formas, se continúa aquí, por otras vías y por otros medios, la progresiva extensión y universalización del SERL. Así pues, se concretan cuatro categorías de contratación temporal causal o común. No obstante, aquí nos detendremos tan sólo en dos: la de contratos para obra o servicio, y la de contratos eventuales por circunstancias de la producción. De esta forma, en el artículo 1.1 del RD 2303/1980 en relación a los contratos por obra o servicio, lo que se viene a decir es que el empresario dispone de la absoluta libertad para establecer el “objeto del contrato y que tendrá como duración el tiempo exigido”. Por más que se hable, asimismo, de que el empleador “especificará con precisión y claridad” el citado objeto, se deja así la determinación total de la causa temporal en manos del empresario¹⁹⁰.

En el artículo 2 bajo la denominación de “Contratos eventuales por circunstancias de la producción”, se reproduce otra vez una especie de *buffet libre* para el empresario en base al artículo 15.2 del ET. Desde circunstancias de producción, acumulación de tareas, excesos de pedidos, razones de temporada... “aún tratándose de actividad normal de la empresa”. Otra vía de cara a la universalización de la contratación temporal.

Las facilidades para el empresario no terminan ahí en ambos casos. En la práctica, durante el primer mes pueden disponer del trabajador a su entera disposición y en el formato en que desee el empleador. Tan sólo “si se prevé que la duración del mismo excede de cuatro semanas” es cuando tendrá que realizar el contrato con la causa que estime oportuno. Además tanto en uno como en otro caso no se establece ningún tipo de indemnización a su finalización (artículo 1.4 y artículo 2.4). De hecho, la *única* limitación relativa a los mismos es su duración máxima, y tan sólo en los casos supuestos los contemplados en el artículo 2, en donde se indica como “la contratación temporal del contrato exceda de nueve meses dentro de un periodo de doce” (artículo 2.4). Nada se dice de la duración mínima. Como tampoco nada se dice o se regula acerca de posibles mecanismos que eviten que una vez cumplidos los tiempos máximos, los trabajadores no puedan ser despedidos y vueltos a ser contratados en el mismo puesto de trabajo a los quince días en un sucesivo *círculo vicioso* de contratación temporal sin límites.

De esta forma, el RD 2303/1980 se convertiría en una de las últimas contribuciones a la *causa de la temporalidad* de los diferentes gobiernos de Adolfo Suárez –democráticos o no democráticos– quien no sólo *pilotaría* la transición a la democracia, sino que también *cimentaría* las bases de la liberalización del SERL.

9.3.2.1. El Acuerdo Nacional de Empleo: a vueltas con el secretismo en torno a la contratación temporal (enero/febrero 1981-junio 1981)

«Un diálogo primaveral como éste debe repetirse todos los años».

¹⁸⁹ Real Decreto 2303/1980, de 17 de octubre, *sobre aplicación del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación temporal* [B.O.E. 29 de octubre de 1980. Entrada en vigor: el 30 de octubre].

¹⁹⁰ En un sentido parecido se ha manifestado Raquel Aguilera al señalar como sobre esta cuestión que «ni el texto legal ni el reglamentario dictado en su desarrollo definieron en ningún momento cual había de ser el objeto del contrato de obra o servicio determinado, lo que provocó que se aceptara en algunos supuestos la validez de esta contrato para atender necesidades permanentes de las empresas. La propia regulación de los contratos temporales estructurales fomentó, por tanto, en ocasiones su uso abusivo» AGUILERA IZQUIERDO, Raquel, “El principio de..., *op.cit.*, p. 103.

El Presidente del Gobierno Leopoldo CALVO-SOTELO en la firma del ANE, un 9 de junio de 1981.

El Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 no triunfa en términos prácticos, pero sí arrastra consigo toda una serie de *efectos deseados* por el gran capital y por la derecha política¹⁹¹. De entrada, tendrá un considerable efecto psicológico en las diferentes direcciones confederales de UGT y de CCOO. Para ambas centrales queda claro que ni la transición política ni la propia transición sindical se pueden dar por terminadas. Un *shock* que va a estar más que presente en la suave pero progresiva desmovilización del propio movimiento obrero durante 1981 –tercera fase de desmovilización *desde arriba* tras lo sucedido en 1976 y en 1979– y en donde si algo ha quedado claro, es que el franquismo, sus estructuras y sus agentes siguen más que presentes en el mundo del trabajo, a pesar de que el Sindicato Vertical ya sea historia.

Pero a su vez el 23-F va a ser instrumentalizado por parte de UCD de forma descarada, en lo referido a la consecución de un nuevo acuerdo social al modo –o al menos aquella sería su intención inicial– de los *Pactos de la Moncloa*, tras rechazar un posible Gobierno de concentración nacional. Un *nuevo* –y conocido, por extensión– *contexto de emergencia* renace en estas circunstancias. Sin que todavía quedara claro las extensiones e interioridades del Golpe de Estado del 23 de febrero, así como la posibilidad de que se pudiera repetir, el *factor* de la *memoria histórica social* va a convertirse en un poderoso aliado de la derecha política. En esas condiciones arrancan las negociaciones oficiosas del futuro Acuerdo Nacional de Empleo¹⁹².

El citado ANE es otro de los *lugares comunes* de nuestro pasado reciente, que han tendido a ser *encajado* –de forma un tanto brusca– en esa pléyade de acuerdos que, al parecer, sustentarían, sin palpables contraindicaciones, el modelo y relato canónico de la transición española. Así pues, se hace imprescindible precisar con datos, fechas y la documentación necesaria, cómo transcurrió la negociación así como cuales fueron sus resultados finales. De entrada, vaya por delante como la suma de acontecimientos que se desarrollan entre febrero a junio 1981, parecen indicar otras lecturas menos *sugestivas* de lo que vienen a contarnos los grandes consensos al respecto.

Si en un principio era fácil predecir un posible *acuerdo* por parte de los principales agentes sociales, difíciles serían sus negociaciones. Las mismas, con sus reuniones públicas, privadas, secretas... y sus otros tantos acuerdos públicos y secretos suponen, a la postre, un punto clave en la acelerada profesionalización del modelo de negociación de los pactos sociales en España –o si se prefiere del “modelo español de concertación social”– que alcanzará su punto culmen con el AES. En total, serán casi tres meses de negociación –entre marzo a junio de 1981– en donde no faltaron los amagos de ruptura, las propias rupturas de las negociaciones, los enfrentamientos verbales, los dramas, los llantos por parte del algún Ministro, así como los llamamientos a la cordura.... Lejos, muy lejos, de la mitificación posterior –al igual que ha sucedido con los Acuerdos de la Moncloa por cada una de las partes firmantes– el texto ANE resultó extraordinariamente complicado de concretarse, y, asimismo las conversaciones que están detrás de él no invitan, exactamente, a la idea del *diálogo* ni de la *concertación*.

En las siguientes páginas no se pretende recorrer en sentido estricto el desarrollo de las negociaciones, tal y como por ejemplo se hará de forma sistemática con la negociación de la RET'84 y el AES. Nos interesa, antes que nada, observar las diferentes posiciones que se van tomando tanto por UGT, CCOO y la CEOE en relación a la contratación temporal, ya que nos serán especialmente útiles en los siguientes capítulos dentro de este IV Epígrafe. Para tal tarea se examinarán algunos de los documentos programáticos por parte de cada uno de los

¹⁹¹ Nos remitimos aquí al apartado “4.4. «Por el cambio»: *el punto de no retorno* (1981-1982)”.

¹⁹² No sería publicado en el B.O.E. Texto localizado en: COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos...*, op.cit., pp. 101-113.

principales agentes sociales, los que nos posibilitará, al mismo tiempo, ir definiendo las líneas maestras de su política de empleo, y más concretamente, su postura frente a la contratación temporal. Por lo demás, téngase presente que el ANE es el último gran pacto social que antecede al AES, y por el que se desarrolla legislativamente el ET, al igual que sucedería tres años más tarde con la RET'84.

Una segunda razón de peso –en parte anunciada– para detenerse en tales tareas, es examinar las reacciones sindicales frente al 23 de febrero de 1981. O formulado con otras palabras: ¿cómo y de qué forma el frustrado intento de Golpe de Estado va a afectar a corto plazo a las estrategias de movilización? ¿En qué vendrá a modificar las principales líneas políticas de UGT y CCOO? ¿Triunfará la estrategia del miedo y la desmovilización? Y, por último, tal apartado otro claro objetivo: analizar la correlación de fuerzas entre capital y trabajo en un momento de inestabilidad política e institucional aguda, como en otros pocos periodos de nuestra reciente historia vivida.

Los antecedentes primigenios del ANE han quedado sepultados ante la trascendencia de lo que sucedió el 23 de febrero y el 24 de febrero de 1981 y las semanas y meses posteriores. De esta forma, y por más que el AMI se renovara a principios de febrero de 1981, la situación económica y política de principios era dramática en términos de estabilidad política e inclusive de sostenibilidad económica. Internarnos por las actas de la CEC de UGT –uno de los documentos fundamentales para historiar el trayecto del sindicato socialista pero también del movimiento obrero español en su conjunto¹⁹³–nos posibilita de forma precisa y clarificadora recorrer estos mismos antecedentes. Todo ello sin renunciar a otros tantos caminos de aproximación documentales.

Así pues, en la primera reunión del año celebrada el 3 de enero de 1981, desde la Comisión Ejecutiva Confederal se fijarían las posturas para renovar el AMI en su vertiente exclusivamente salarial, aunque dejaba la última decisión para un Comité Confederal extraordinario a celebrarse un 4 de enero¹⁹⁴.

Más allá de sus muy parciales resultados de CC extraordinario –en donde por primera vez se hablaría de avanzar hacia un acuerdo nacional sobre empleo– en la reunión de la CEC se tomaría primero la “decisión de no aceptar a USO en la mesa de negociación”, a la par que se quería evitar posibles “contradicciones entre un enfrentamiento con CCOO en el sector privado y la necesidad de ir a movilizaciones conjuntas en el sector público sujeto a la reestructuración”¹⁹⁵. Difícil tarea cuando la *unidad de acción* no era pensable ni viable.

Fijados parcialmente los objetivos base de cara la futura negociación en la citada reunión del Comité Confederal extraordinario de principios de enero, en cualquier caso las dudas seguirían durante los siguientes días. Así se observa en las actas de las reuniones del 9, 12 y 22 de enero. En plena *resaca* de las elecciones de 1980 –en donde UGT reduciría considerablemente su diferencia con CCOO, pasando del 21,7% obtenido en 1980 al 29,3% con respecto del 34,5% al 30,9% de Comisiones Obreras, respectivamente¹⁹⁶– una de las

¹⁹³ Nos remitimos aquí al apartado “2.3. *Papeles* para una historia del tiempo vivido”.

¹⁹⁴ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Organización, “Acta. Comité Confederal extraordinario celebrado en Madrid el 4 de enero de 1981”, sig. 002603-001.

¹⁹⁵ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Organización, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 3.1.81”, sig. 002561-002. Véase, igualmente, “Noticia, “UGT propone incrementos salariales situados entre el 13% y el 16%”, *El País*, 6 de enero de 1981.

¹⁹⁶ VEGA, Rubén, *La reconstrucción de..., op.cit.*, 323. Véase en el *anexo estadístico* el Gráfico 32 y la *Tabla 161*. En aquella ocasión no faltaría la *lectura optimista* por parte de *El País*. Así, por ejemplo, el periodista Julio Fernández en una noticia al respecto, constataba como tales resultados llevaban a la evidencia de una traslación de los votos «hacia los sindicatos de clase más moderados». Noticia, Julio Fernández, “UGT se sitúa al nivel de representatividad de CCOO”, *El País*, 22 de enero de 1981. Por su parte en un editorial del mismo medio de comunicación se planteaban varias conclusiones a tener en cuenta. Entre otras destacaba la siguiente: «El retroceso de CCOO, que se perfilaba a la salida del

preocupaciones principales, a partir de aquel momento, sería evitar una posible recuperación política y de movilización de las propias CCOO, por la vía de reengancharse al AMI¹⁹⁷. Por tanto, el objetivo pasaba por mostrar a la “UGT ante el país como Central negociadora, y la del mantenimiento real del poder adquisitivo en base al doble mecanismos de la banda y de las cláusulas de revisión”¹⁹⁸.

La posterior celebración de otro Comité Confederal de los días 24 y 25 de enero –el segundo en tan sólo un mes, lo que da cuenta de la situación de tensión que se vivía en múltiples frentes– tampoco serviría para terminar de fijar definitivamente los puntos a negociarse frente a la posible renovación del AMI. Por cierto, no faltaría en aquella ocasión auto-celebración por los resultados de las elecciones sindicales de 1980¹⁹⁹.

Así las dudas sobre renovar o no el AMI persistirían hasta el último momento. Dudas, en cualquier caso, bastante *sui generis* cuando UGT siempre había terminado por firmar cualquiera de los acuerdos macros o interconfederales. Hasta tal punto que en la reunión del 27 de enero de la CEC de UGT se tomaría la decisión de “adoptar colegialmente una posición límite de negociación”, ante la “poca flexibilidad [de la] patronal” así como sus tácticas de “dilación en el tiempo”²⁰⁰. Una decisión que sería, ahora sí, refrendada por la convocatoria de un nuevo Comité Confederal extraordinario el 2 de febrero²⁰¹.

Como todo acuerdo social o interconfederal, indiferentemente de su contenido y naturaleza, la renovación del AMI implicaría fuertes tensiones como venimos advirtiendo. *Tensiones* en muy delicado momento político. Así en términos generales, la mayor parte de los estudios hasta ahora publicados, no han valorado en todas sus dimensiones la trascendental importancia tanto del ABI como del AMI de cara a garantizar la paz social. Limitándose, de hecho, a examinar el desarrollo de las negociaciones así como su contenido, y a leerlos como un mero “instrumento de cohesión social”.²⁰² Por el contrario, nos atreveríamos a afirmar que el

franquismo como la central abrumadoramente hegemónica, gracias al prestigio duramente conseguido bajo la represión, se podría explicar así por la voluntad de mantener contra viento y marea un modelo de conflictividad laboral cristalizado durante la dictadura, en la nueva situación que la legitimidad democrática de las instituciones había creado». Y, por otro lado, también apuntaba: «La violenta denuncia contra el Estatuto de los Trabajadores, campaña en la que UGT desempeñaba el papel de chivo expiatorio y de blanco de las invectivas de CCOO, tampoco parece haber dado los resultados que sus promotores esperaban». Editorial, “Balance de las elecciones sindicales”, *El País*, 24 de enero de 1981. En cualquier caso, tampoco faltarían las tradicionales denuncias de compra de votos y de falsificación de actas: Noticia, “USO denuncia manipulaciones de actas electorales”, *El País*, 27 de diciembre de 1980; Noticia, “CCOO ganó las elecciones sindicales, según datos del Ministerio de Trabajo”, *El País*, 24 de enero de 1981.

¹⁹⁷ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 12.1.81”, sig. 002561-002. En ese mismo documento se llegaría a dar la siguiente instrucción de cara a una posible futura reunión con la Federación del Metal de CCOO: «No tocar en principio el tema de la posibilidad de enganche de CCOO al AMI, relegando en todo caso el problema a la firma del Acuerdo Marco». Véase también, AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal 19.1.81”, sig. 002561-002.

¹⁹⁸ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 22.1.81”, sig. 002256-002.

¹⁹⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Análisis y balance de las elecciones sindicales de 1980”, Madrid, 24 y 25 de enero de 1981, sig. 002603-003; y, AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Organización, “Acta. Comité Confederal celebrado en Madrid los días 24 y 25 de enero de 1981”, sig. 002603-004

²⁰⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 27.1.81”, sig. 002561-002.

²⁰¹ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Organización, “Acta. Comité Confederal extraordinario celebrado en Madrid el 2 de febrero de 1981”, sig. 002603-005.

²⁰² Véase aquí, por ejemplos, los argumentos presentados por, PÉREZ INFANTE, José Ignacio, “La concertación y el diálogo social en España: 1977-2007”, *Revista del Ministerio de Trabajo e*

gran valor otorgado tanto por parte del Ejecutivo como por parte de la clase empresarial –tanto en este caso como en otros tantos– con respecto a este tipo de acuerdos, en realidad, residiría en convertirse en *amortiguadores* del conflicto social. Y, a buen seguro, sin este punto de partida cualquier posible aproximación, resultaría incompleta en términos históricos.

En este sentido, la firma y el desarrollo del AMI cumplirían tales funciones, más aún tras la ausencia de CCOO del mismo. Así, por ejemplo, a finales del año 1980 se reduciría muy considerablemente la conflictividad laboral. CEOE calcularía tal reducción tan sólo en el mes de noviembre de 1980 en cerca del 60%²⁰³ y un 80% para el mes de enero de 1981²⁰⁴. Lo que en un país como España que había encabezado entre 1975 a 1979 los mayores índices de conflictividad en el mundo occidental, sin duda, era todo un logro²⁰⁵. Por estas mismas razones, bien se puede entender el empeño desde las esferas de poder en que no se malograra su posible renovación de cara a 1981, especialmente cuando en el anterior año se había cerrado el IPC con 15,6 puntos tan sólo una décima menos que en 1979.

La sola posibilidad de que no se renovará el AMI y se pudiera abrir un proceso de negociación colectiva convenio por convenio, levantaría todas las alarmas ante un más que posible incremento de la conflictividad laboral. Más ahora teniendo en cuenta el *giro estratégico* de CCOO de no “auto-marginarse” en adelante –como veremos a continuación– al respecto de este tipo de acuerdos²⁰⁶.

En realidad, el único punto de discrepancia entre la UGT y la CEOE por aquellas alturas era el establecimiento de la banda salarial: del 12% al 15% por parte de UGT y del 10 al 14% por parte de la CEOE²⁰⁷. Como solía ocurrir, al final, la cosa quedó en una posición media: entre el 11% al 15%. Datos, en todo caso, que superaban las previsiones del Ejecutivo²⁰⁸. El acuerdo llegaría en un momento clave, definitorio de la vida política nacional: el mismo día de la dimisión de Adolfo Suárez un 29 de enero de 1981. Sin duda tal anuncio a las 19.47 horas de la tarde de aquel jueves, influiría en el ánimo de los representantes de UGT y CEOE, quienes prolongarían las negociaciones hasta las seis de la mañana del viernes 30 de enero. Alcanzado el principio de acuerdo, mientras que desde la central ugetista se defendería el AMI como un logro que permitiría el mantenimiento del poder adquisitivo, por su parte desde la central patronal calificaría al mismo como un elemento “estabilizador”²⁰⁹. No faltarían las consabidas celebraciones, por más que en aquella ocasión no se pudiera frenar la escalada movilizadora de

Inmigración, nº 81, (2009), pp. 41-70. En esta línea, por lo demás, consúltase un artículo publicado durante aquellos mismos meses por quien llegaría a ser el Presidente del Consejo Económico y Social: PEÑA, Marcos, “Del pacto social al pacto político-social”, *El País*, 21 de febrero de 1981. Y por último nos remitimos a lo apuntado en el apartado “2. 2.3. Estudios y aproximaciones a la concertación social, la negociación colectiva, la política de rentas y las reformas del mercado de trabajo”.

²⁰³ Noticia, “Descendió la conflictividad laboral en noviembre”, *El País*, 2 de enero de 1981.

²⁰⁴ Noticia, “La conflictividad laboral se redujo casi un 80% en enero”, *El País*, 19 de febrero de 1981.

²⁰⁵ Noticia, Andrés Ortega, “España, el país occidental más conflictivo en lo laboral”, *El País*, 1 de febrero de 1981.

²⁰⁶ Noticia, Julio Fernández, “La posible ruptura del acuerdo-marco, por discrepancias salariales, endurecería gravemente la negociación colectiva”, *El País*, 25 de enero de 1981. Nos remitimos, por lo demás, a lo apuntado en el Capítulo “11. En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero/febrero 1984-julio 1984)”.

²⁰⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT y CEOE dejan para próximas reuniones la banda salarial”, *El País*, 28 de enero de 1981.

²⁰⁸ Noticia, “CEOE y UGT fijan la revisión salarial entre el 11% al 15%”, *El País*, 29 de enero de 1981.

²⁰⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “CEOE y UGT completan el AMI con el acuerdo sobre revisión semestral”, *El País*, 30 de enero de 1981.

los trabajadores del sector público²¹⁰. Firmado el martes 3 de febrero de 1981, en plena crisis institucional, desde *El País* no se dudaría en congratularse por ese *feliz entendimiento* con el que se podía desterrar, parcialmente, un problemático aumento de la conflictividad laboral²¹¹. Por lo demás, si bien UGT evitaría el reenganche de CCOO, no sería posible frenar la posterior incorporación de USO tras las negociaciones con la CEOE. Un texto que se publicaría en el BOE el 25 de febrero de 1981²¹². A no más tardar, por tanto, sus efectos sobre el descenso de la conflictividad laboral serían notorios²¹³.

Justamente, las dificultades en lograr la renovación del AMI van a generar una amplia reflexión en el seno de la dirección confederal de UGT, al respecto de la conveniencia o no de seguir dicha estrategia, teniendo siempre presente como su objetivo básico pasaba por conquistar la hegemonía sindical²¹⁴. En pleno proceso de desintegración de la UCD quien celebraría en aquel mes de febrero su II Congreso –el cual terminaría con una total ruptura organizativa– sumado al proceso de degradación continuado del mercado de trabajo y ante la constatación de su soledad –y por tanto *debilidad*– en el marco de una negociación exclusivamente frente a la CEOE; empezaría a tomar acomodo la posibilidad de ir hacia un nuevo acuerdo social más amplio. En este *parcial giro* mucho pesaría los llamamientos del futuro Presidente del Gobierno a principios de aquel mes de febrero de ir hacia un nuevo pacto que garantizará la paz social. Más aún cuando fuertemente presionados tanto Calvo-Sotelo como por la propia CEOE, venían comprobando como convenio tras convenio se fijaba la subida salarial en la banda alta del AMI –del 11% al 15% tras su revisión en 1981²¹⁵.

Es en este marco y tras la citada reunión del Comité Confederal extraordinario del 2 de febrero, cuando comienza a tomar forma la *reformulación estratégica* antes citada. Movimientos que tienen su confirmación en la reunión de la CEC celebrada el martes 17 de febrero –como era entonces costumbre celebrar en aquel día la reunión semanal correspondiente–. Allí se inicia primera fase de elaboración de propuestas frente a la demanda de Calvo-Sotelo de ir hacia un “Pacto Nacional por el Empleo”²¹⁶.

Al igual que sucedería en otros momentos claves en los años principales que nos movemos –tal y como tendremos la oportunidad de comprobar en más de una ocasión– existen determinados vacíos en relación a las actas de la CEC que venimos trabajando, que, o bien,

²¹⁰ Sobre el incremento de la conflictividad en este sector, Noticia, “El sector del metal fue el más conflictivo en marzo”, *El País*, 22 de abril de 1981. Allí se informaba de cómo tan sólo en el mes de marzo de 1981 se habían perdido 2.087.932 horas de trabajo. En total el 33,32% de las horas perdidas en todos los sectores.

²¹¹ Noticia, “Firmada la revisión del AMI”, *El País*, 4 de febrero de 1981; Editorial, “La renovación del acuerdo-marco”, *El País*, 4 de febrero de 1981.

²¹² Resolución del 12 de febrero de 1981, *del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, por la que se acuerda la publicación del texto revisado del Acuerdo Marco Interconfederal* [B.O.E. 25 de febrero de 1981]. Por lo demás, consúltense: CEOE, *Acuerdo Marco Interconfederal: Revisión 1981. Instrucciones y recomendaciones*, [Madrid], CEOE, 1981: id., *Circular sobre instrucciones y recomendaciones para la negociación colectiva*, Madrid, CEOE, 1981.

²¹³ Noticia, “La conflictividad laboral disminuyó un 70% durante el mes de abril”, *El País*, 7 de mayo de 1981.

²¹⁴ Firmado el AMI las dudas sobre un posible reenganche de CCOO al AMI –que finalmente no se produciría– van a continuar, tal y como se muestra en el reunión de la CEC del 10 de febrero. De hecho, la posibilidad de que CCOO finalmente se pudiera sumar al mismo quedaría condicionada a una «previa conversación con la CEOE», según informaba el propio José M^a Zufiaur. AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 10.2.1981”, sig. 002561-002.

²¹⁵ Noticia, “Intento de realizar la investidura de Calvo Sotelo con paz social”, *El País*, 7 de febrero de 1981.

²¹⁶ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 17.2.1981”, sig. 002561-002.

pueden responder a la no convocatoria de reuniones –una hipótesis difícilmente sustentable– al extravío propio de las actas –también una hipótesis de difícil de mantener– o directamente pudiera pensarse que o no se realizaron las actas correspondientes o se decidió, en su día, no incluirlas en los libros que hemos manejado.

En todo caso, a la hora de evaluar el *parcial giro* por el que opta UGT de cara al superar el AMI, el propio Nicolás Redondo aclararía las posibles dudas en un artículo publicado meses después en el órgano de expresión de CCOO, “Gaceta Sindical”. En un texto de *corte amable* y en donde se reclamaría la *paternidad del ANE* se indicaba lo siguiente: “[T]ras la revisión del AMI, en enero de 1981 [nos llevó] a formular el llamamiento público a las fuerza sociales del país que dio comienzo a la serie de reuniones entre las partes implicadas [...] para buscar salidas a la grave situación que nos acosaba y acosa. De ahí nació el ANE”²¹⁷.

Mientras tanto, desde la otra gran central del país –Comisiones Obreras– también se estaban produciendo movimientos significativos en aquellas fechas antes del 23 de febrero de 1981. Quince días antes de que el Presidente Suárez dimitiera –el 29 de enero– tenía lugar una reunión entre CCOO y UGT –15 de enero– y también días antes una delegación de CCOO –Nicolás Sartorius, Marcelino Camacho y José M^a Corell– se reuniría con el Ministro de Trabajo –Pérez Miyares– de cara a tantear el terreno así como de cara a exponer su Plan Nacional contra el Paro y la Crisis. Al respecto, el análisis de Sartorius –miembro de la directiva de CCOO– era del todo clarificador de la situación de parálisis en todos los frentes:

«En una reciente entrevista con el Ministro de Trabajo, éste opinó que el Gobierno no está cerrado a una posible negociación sobre este tema [crear las condiciones de un plan de solidaridad contra el paro]. Dijo que le parece prematuro, que tenía miedo al fracaso y que en este momento sólo veía una fase de tanteo pero no de negociación propiamente dicha. Son conscientes de que una negociación centrales, Gobierno, empresarios –y más tarde el Parlamento–, de llevarse a efecto, supondría un cambio de política económica y, por lo tanto, de la actual política y del actual Gobierno. La UGT, no ve con entusiasmo el tema, aunque dice estar de acuerdo en el planteamiento; no tiene elaborado casi nada, lo ve a un plazo más largo – Presupuestos de 1981–; rehúye compromisos sobre movilizaciones [...].

En realidad, no ven salida al tema hasta la llegada del PSOE al poder en 1983, si no hay elecciones anticipadas»²¹⁸.

En aquel entonces Comisiones Obreras estaba enfrascada –ya en una fase avanzada– de la elaboración original de su “Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y la Crisis” (PSNPC)²¹⁹. No obstante, la dirección de Comisiones Obreras no estaba pasando su mejor momento. Los costes de no firmar el AMI se estaban haciendo cada vez más evidentes, e incluso voces influyentes del Secretariado Confederal denunciaban la necesidad de “retornar la iniciativa” o directamente hablaban del “gran descontento en la base del sindicato”²²⁰.

²¹⁷ REDONDO, Nicolás, “El Acuerdo Nacional sobre Empleo”, *Gaceta Sindical*, n° 15, (noviembre 1981), p. 4.

²¹⁸ SARTORIUS, Nicolás, “Información sobre las reuniones de CC.OO. con el Ministro de Trabajo y la UGT”, *Gaceta Sindical*, n° 9, (1981), p. 18.

²¹⁹ Un balance crítico sobre el mismo en, SOTO CARMONA, Álvaro, “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)” en RUIZ, David (dir.), *Historia de Comisiones...*, op.cit., pp. 458-459.

²²⁰ Nos referimos a las críticas que se pudieron escuchar en la reunión del Secretariado Confederal de CCOO el 15 de enero de 1981 por boca de Joan M^a Corell y C. García. Una tensa reunión se harían patentes las tensiones desatadas en el interior de la dirección de Comisiones Obreras al no haber firmado el AMI. Allí López Bulla de la CONC indicaría lo siguiente: «Estamos sin saber qué hacer ante la negociación colectiva, hay que tener una iniciativa clara de la Confederación». Por su parte Adolfo Piñedo también declararía: «Está convenido que estamos ante una maniobra de UGT. La patronal no negociará hasta que se aclara el tema del AMI». Incluso el propio Camacho reconocía como «perdimos la iniciativa en al AMI» para afirmar a continuación «ahora la estamos recuperando». AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 15-I-1981”, sig. 002-032. Pocos días después, Comisiones Obreras declararía públicamente como durante 1981 no iría contra el AMI, pero que

En esa situación de *impasse* y de cara a superarlo se discutiría y se aprobaría en el Consejo Confederal del 14 y del 15 de febrero, el gran proyecto programático de las Comisiones Obreras –nos referimos, claro está al PSNPC– que había comenzado a cobrar forma en el I Congreso Confederal (1978)²²¹, y que se mantendría vigente durante el tiempo que transcurre del II (1981)²²² al III Congreso Confederal del sindicato (1984)²²³. En síntesis, aquel extenso PSNPC vendría a constituirse en todo un programa de gobierno social, que pretendía cambiar la lógica de salida a la crisis económica hasta entonces implantada.

Pero más allá de sus muchas propuestas –como por ejemplo, las que se pueden localizar en el punto “3. Protección a los parados”– nos interesa detenernos, por el momento, en su apartado “2. Medidas tendentes a paliar los efectos del paro sobre el mercado de trabajo” para interpretar más adecuadamente la posición que, en adelante, tendrá Comisiones Obreras frente a la continuada flexibilización del SERL y la extensión de la contratación temporal, así como en relación a las negociaciones del futuro ANE. Junto a las tradicionales medidas de redistribución del empleo, pluriempleo, jubilaciones... el citado PSNPC contenía un interesante punto “2.2. Programas de empleo” en donde, de entrada, se decía lo siguiente: “Los programas de empleo tienen como objetivo *mejorar* la situación de determinados colectivos de trabajadores para su más fácil contratación”. Incidiendo también en: “Así, pues, discriminan favorablemente a grupos de trabajadores discriminados negativamente por la lógica del mercado de trabajo, tratando de anular este último efecto”. El intento de vuelta a la concepción *oficial* de las políticas de empleo no terminaba ahí. “Por ello mismo, conviene no utilizar indiscriminadamente esta figura, ni ampliar excesivamente los grupos afectados, ya que con ella se perdería la eficacia y tales programas se convertirían en una bonificación poco selectiva al empresariado”. En resumidas cuentas, y según CCOO, los programas de fomento del empleo debían concentrarse en tan sólo tres colectivos: jóvenes, trabajadores en situación de paro de más de un año y mayores de cuarenta y cinco años.

Así la posición de CCOO sobre la contratación temporal era lo más restrictiva posible – desde la óptica liberal/flexibilizadora– y siempre de cara a evitar su extensión y su instrumentalización de forma indiscriminada. Así se podía leer: “c) Los contratos serán temporales, con medidas que favorezcan su conversión en fijos”; “d) A partir de un determinado tamaño empresarial (podría ser más de 50 trabajadores) existirán cláusulas de limitación en el número de contratos realizados por esta vía”; o como se indicaba en el punto: “f) Cláusula de garantía para los trabajadores fijos, evitando que los mencionados programas realicen una mera sustitución”.

De esta forma, en aquel preciso momento la principal diferencia entre UGT y Comisiones Obreras, superado el tiempo de las elecciones sindicales de 1980 y de la negociación y revisión del AMI, era si el posible y futurible acuerdo social tendría que ser a tres o cuatro bandas, respectivamente.

En un incesante mar de rumores sobre movimientos golpistas²²⁴, a enturbiar el por sí *gris panorama* vendría a sumarse en los días previos al discurso de investidura de Calvo-Sotelo,

defendería su postura en el proceso de negociación colectiva. Noticia, “CCOO no irá contra el AMI en 1981”, *El País*, 18 de febrero de 1981.

²²¹ AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión del Consejo Confederal de los días 14/15-II-1981”, sig. 1-15.

²²² Véase al respecto el ‘Proyecto de Ponencia del II Congreso Confederal de Comisiones Obreras’ titulado “La acción de CCOO ante la Crisis y el Paro”, en el número extraordinario de *Gaceta Sindical*, nº 11, (1981).

²²³ Su primera formulación se puede localizar en: COMISIONES OBRERAS, “Proyecto de Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y la Crisis”, *Gaceta Sindical*, nº 9, (1981), pp. I-XII. En aquel mismo número también resulta de interés leer los siguientes artículos: CAMACHO, Marcelino, “La solidaridad, necesidad de clase y necesidad nacional” (p. 18); CORELL, José M^a, “Primeras acciones” (pp. 19-20).

²²⁴ Véase la *nota 191*.

el asesinato de Estado del presunto miembro de ETA militar José Arregui. De esta forma, y en medio de numerosas denuncias e inclusive de no pocas dimisiones de altos mandos policiales, el futuro Presidente del Gobierno encaraba su investidura con el apoyo exclusivo del Grupo Parlamentario de UCD²²⁵.

Precisamente aquel discurso realizado un miércoles 18 de febrero de 1981 –y sobre el que a continuación nos detendremos en relación a la propuesta de ir hacia un nuevo acuerdo social– tendría la virtud de concitar la unanimidad de la oposición en su contra por su marcada orientación derechista²²⁶. El propio Alfonso Guerra calificaría el mismo como un *discurso monacal* para afirmar también: “Me ha parecido un discurso de buenas impresiones, sin comprometerse a nada. Mejor dicho, se ha comprometido en dos puntos que nos parecen muy preocupantes: la moderación salarial y el ingreso en la OTAN”²²⁷. Desde *El País* se criticaría a su vez el tono *monocorde* y *gris*, cuestionando su falta de entusiasmo pero sobre todo los “contenidos planos”, allí marcados²²⁸.

La votación prevista para el viernes 20 de febrero de 1981 a las 19.30 horas dio el resultado esperado: 165 votos a favor, todos procedentes de UCD, a excepción de tres votos de Coalición Democrática y uno del Grupo Mixto. Le faltarían en aquella ocasión 7 votos para la Investidura como Presidente²²⁹. Prevista la siguiente votación para el lunes 23 de febrero de 1981, la misma no podría llevarse adelante por el Golpe del 23-F. Tras aquellos fatídicos días, finalmente, sería investido el jueves 26 de febrero de 1981.

La reivindicación de la figura de Calvo-Sotelo –y todavía menos su discurso de investidura– no es un objeto que circule por los discursos habituales historiográficos. No obstante, excepciones se pueden localizar²³⁰. En lo que aquí nos interesa, el citado *discurso* trataría de combinar toda una pléyade de medidas de clara orientación liberal –tan alejadas de los presupuestos teóricos antes que prácticos de los ejecutivos presididos por Suárez– y una llamada al diálogo social, que realmente cobraría fuerza tras los sucesos del 23 y 24 de febrero. Aunque no es este un espacio para las especulaciones, a buen seguro, aquella *llamada* sin el 23-F hubiera tenido, a buen seguro, otro transcurrir.

«Reconocido el paro como el principal problema social y económico del país, quiero afirmar rotundamente que el Gobierno que me propongo constituir dedicará todo el tiempo y toda la energía de que disponga a crear los empleos que demanda nuestra sociedad. Esta voluntad firme tratará de servirse de fórmulas responsables, porque la creación de empleos no admite simplistas ni recetas rápidas. No habrá en España remedio eficaz y duradero para el

²²⁵ Véanse: Noticia, “UCD asegura que se exigirán responsabilidades por la muerte de Arregui”, *El País*, 17 de febrero de 1981; Noticia, “La dimisión de altos mandos policiales añade tensión a la investidura de Calvo Sotelo”, *El País*, 16 de febrero de 1981; Noticia, “Calvo Sotelo presenta hoy su programa al Congreso sin más apoyos seguros que los de UCD”, *El País*, 18 de febrero de 1981.

²²⁶ Noticia, Bonifacio de la Cuadra, “Calvo Sotelo presentó un programa de gobierno que la oposición estimó marcadamente derechista”, *El País*, 19 de febrero de 1981.

²²⁷ Noticia, “El discurso de Calvo Sotelo no gustó a la izquierda y las minorías nacionalistas”, *El País*, 19 de febrero de 1981.

²²⁸ Editorial, “El síndrome gris”, *El País*, 19 de febrero de 1981; y también, Editorial, “Los silencios del candidato”, *El País*, 20 de febrero de 1981.

²²⁹ Noticia, “A Calvo Sotelo le faltaron siete votos para la investidura”, *El País*, 21 de febrero de 1981. Y también, Editorial, “Hasta el lunes”, *El País*, 21 de febrero de 1981.

²³⁰ «La contribución de Leopoldo Calvo Sotelo a la consolidación de la joven democracia española no ha recibido seguramente el reconocimiento académico ni social que realmente merece, injusticia que este breve artículo, en la modesta medida de sus posibilidades, quisiera contribuir a rectificar». Quien esto escribe es Charles Powell, uno de los historiadores que con mayor detenimiento ha observado este periodo. Un autor quien no dudaría en calificar de «excelente» el *discurso de investidura* mencionado. POWELL, Charles, “Leopoldo Calvo Sotelo: corrigiendo el rumbo de una democracia amenazada”, *Revista de Occidente*, nº 336, (2009), p. 41.

problema del empleo en tanto no crezca más nuestra economía y mientras no se lleven a cabo las modificaciones y las transformaciones estructurales pendientes».

Si hasta aquí, en realidad, el discurso de Calvo-Sotelo se plantearía en términos políticamente neutros, la orientación que propone para la *salida* a la crisis así como las soluciones con respecto al mercado de trabajo, tomarán, en breve, una clara dirección en base, exactamente, a la cada vez más imperante *nueva lógica liberal*. Eso sí, con una novedad apreciable, pues se ligaría el problema del alto desempleo con las propias características intrínsecas de nuestro modelo productivo:

«Sería, sin embargo, parcial, y por ello poco eficaz, una estrategia que fundamentara el crecimiento económico solamente en la inversión pública y en el apoyo selectivo a determinados sectores inversores. Es urgente proseguir el camino hacia la creación de las condiciones que hagan posible un crecimiento sostenido de la inversión privada y la consiguiente creación de puestos de trabajo. En este sentido, creo que [...] el persistente incremento del desempleo en España tiene causas específicamente españolas ligadas a las peculiaridades de nuestro sistema de contratación laboral y de nuestro sistema de financiación de la Seguridad Social».

Bajo la obligatoria necesidad de “corregir” estos agudos problemas, y tomando por referencia lo realizado en el marco europeo, a continuación presentaría las líneas maestras de la futura política de empleo a desarrollar, y que, en primer término, tenía por objetivo “el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, configurando así un marco más flexible y eficaz”. También, por este lado, la lógica de la flexibilidad liberal era más que constatable. Como también lo era cuando se proponía “[r]educir los costes de la Seguridad Social”, y se reclamaba “durante algún tiempo, además, una moderación en el crecimiento de los salarios”. Todo ello revestido como el único camino posible: “Sin un ajuste de los salarios no hay solución posible al problema del paro en nuestro país”.

Sin ánimo de interferir en la “negociación colectiva” se advertía que tampoco se sería un “espectador indiferente”. Y a partir de aquí llegaba la propuesta de diálogo presupuesta en un “esfuerzo colectivo”. En concreto, se decía literalmente:

«Resulta claro que la creación de empleos pide de la sociedad española un esfuerzo colectivo y una cooperación de todos los agentes de la economía. Apoyándome en esa realidad estimo necesario abrir un diálogo con las fuerzas sociales y económicas para la configuración conjunta de un programa concreto, realizable y ambicioso de acciones contra el paro».

Una invitación que hacía tiempo que no es escuchaba en boca de dirigentes gubernamentales. Por más que se matizara que no era su “propósito inventariar y desarrollar [...] las cuestiones que deberán ser tratadas”, dejaría apuntado como posibles puntos de cara a una negociación los siguientes:

«Medidas de Formación Profesional y de apoyo al empleo juvenil. Medidas para favorecer la movilidad intersectorial, interprofesionalidad y geografía de la mano de obra. Reducción de la edad de jubilación, con financiación de su costo a cargo del Estado y de las empresas. Establecimiento de una ayuda especial al parado con cargas familiares, después de agotados los plazos del subsidio. Fomento de programas de empleo en el marco de la programación regional. Convenios con sectores y empresas para la creación de empleo a partir de nuevas modalidades de contratación»²³¹.

El camino, pues, quedaba marcado en una clara y casi única dirección. Un mensaje que tras el 26 de febrero de 1981 fundamentaría, de hecho, el arranque de uno de los acuerdos sociales más importantes y trascendentales en la historia de la concertación social. No tanto por las cuestiones estrictamente laborales sino por su *necesidad política* de cara a garantizar la estabilidad institucional antes inclusive que la paz social.

²³¹ CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, *Investidura del Presidente del Gobierno (Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo)*, I Legislatura, 18 de febrero de 1981, núm. 143 (número de expediente 080/000002), p. 9153.

“Los sucesos de los días 23 y 24 de febrero, ponen de manifestó con claridad, que el periodo de transición y consolidación de la Democracia no ha concluido”, decía el comunicado de la SC de CCOO. Pero no se dejaría pasar la ocasión para que en ese mismo punto del *comunicado*, se abriera el camino para el diálogo y la cooperación de cara a superar la mencionada situación: “Ello requiere un importante esfuerzo de cooperación entre las principales fuerzas democráticas políticas y sociales, impulsando desde un gobierno de amplia base social, en el que puedan sentirse representados los trabajadores”²³². Para el conjunto de CCOO la solución pasaba por afrontar los dos grandes problemas nacionales de forma conjunta: la consolidación de la democracia y el paro.

El propio Marcelino Camacho va a resumir la predisposición de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de la siguiente forma, tras advertir como justamente el elemento más débil del proceso de transición era el sindical: “CC.OO. está dispuesta a discutir inmediatamente con los compañeros de UGT, con el Gobierno y con la CEOE estos planteamiento de solidaridad contra el paro y la crisis de cara a ir hacia una política de pleno empleo o de plena protección al parado”. Destacando ante todo la imperiosa necesidad –vistas las circunstancias– de lograr la *unidad de acción* al precio que fuera posible: “[L]o que sí creo es que es necesario una unidad de acción más fuerte con UGT, con las fuerzas sindicales de clase y democráticas”²³³.

“Sin entrar en más detalles, es necesario señalar que los acontecimientos de los días 23 y 24 de febrero han venido a modificar las coordenadas políticas anteriores [...]. Posiblemente hemos entrado en un régimen de democracia vigilada”, se indicaba en el extenso informe que la CEC de UGT enviaría a los miembros del Comité Confederal, de cara a su reunión extraordinaria del 27 de marzo de 1981²³⁴. Todo un aviso de la nueva etapa que se abría en adelante. Pero hasta llegar al citado informe –uno de los documentos de estrategia mejor elaborados por parte de la UGT durante este periodo– transcurría más de un mes desde el 23F, en donde la posición política del conjunto de la familia daría un vuelco considerable al respecto²³⁵. En dicho *cambio* mucho tendría que ver las primeras tomas de contacto informales tanto con el Gobierno como con la CEOE y por descontando con CCOO. Tras la investidura de Calvo-Sotelo el 26 de febrero, desde la dirección de UGT se va a supeditar en las siguientes semanas toda su iniciativa a la propuesta política del PSOE de ir a un Gobierno de coalición²³⁶.

Junto con la anterior situación se evidenciaría en aquellos días una palpable muestra de falta de información de los reales movimientos políticos que se estaban produciendo. Así se puede leer en el acta de la reunión de la CEC de UGT del 3 de marzo como “[s]iendo la

²³² AHT, CCOO-SC, “Resolución sobre el 23-F”, Madrid, 25 de febrero de 1981, sig. 002-037 Véase igualmente el comunicado de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras en donde se hacía un llamado a la unidad de acción. Cuestión esta última que se convertiría en una constante en las siguientes semanas: «Cumplir con este objetivo [consolidación de la democracia] nos exige en primer lugar a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, restablecer la unidad de acción a partir del lanzamiento de una gran campaña de sensibilización democrática». AHT, CCOO-CEC, “Comunicado. Tras el intento de golpe de Estado, resolución de la Comisión Ejecutiva”, Madrid, 3 de marzo de 1981, sig. 001-00013.

²³³ CAMACHO, Marcelino, “Campaña de defensa y consolidación de la democracia”, *Gaceta Sindical*, n° 10, (marzo 1981), pp. 5 y 8, respectivamente. Introducía también en aquella ocasión una de las demandas más repetidas por parte de CCOO –y de UGT por extensión– y que tendrá en el ANE un capítulo central: «Desde una legislación que no favorece su instalación, la no devolución del patrimonio sindical, es negarnos un poco el pan y la sal, hasta dificultar prácticamente su posición el que dispongamos de medios propios para financiar los recursos». *Ibidem*, p. 5.

²³⁴ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe que presente la C[omisión] Ejecutiva Confederal al Comité Confederal Extraordinario”, Madrid, 27 de marzo de 1981, sig. 002603-006.

²³⁵ Sobre la posición y estrategia adoptada por el PSOE, véase la *nota 191*.

²³⁶ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 25/26.1.1981”, sig. 002561-002.

impresión general de que falta una información directa sobre la situación originada”, se solicitaba una reunión con la CEF del PSOE para “disponer de una mayor información”²³⁷.

Rechazada la posibilidad de un Gobierno de coalición, y frustrados los deseos de la dirección socialista de haber alcanzado por esta vía lo antes posible el poder político; se llevaría a cabo un reacomodamiento de la estrategia ugetista a las nuevas circunstancias, en una coyuntura de constantes reuniones y movimientos en la sombra. A partir de ahí y hasta la reunión del Comité Confederal extraordinario del 27 de marzo, se va estructurando la propia estrategia frente a la propuesta de un posible Acuerdo Nacional de Empleo. Pese a la complicada situación política, en este caso UGT mostraría muchas más dudas frente al proceso de diálogo que en relación a anteriores negociaciones de pactos sociales. En estas dilaciones mucho pesaría, qué duda cabe, el rechazo de la oferta de gobierno del PSOE. Así se comprueba en las reuniones del 10 y del 17 de marzo del órgano central de dirección ugetista. Mientras que en la primera se duda de llegar a un acuerdo de mínimos o de avanzar hacia un “acuerdo amplio”²³⁸; en la segunda, sería el propio Corcuera quien mostraría su “preocupación de que podamos entrar en las prenegociaciones sin tener aún un criterio de organización [...] y sin que sobre todo uno de los aspectos que indudablemente habrá de debatirse por las posturas que nos deja entrever la Administración: en el de la política de rentas”. He aquí uno de los principales escollos de las negociaciones a las que, en breve, se enfrentarían tanto UGT como CCOO, pues pactar una nueva moderación salarial sería complicado de explicar, argumentar y justificar ante sus propias bases. A ello se añadirían las primeras reticencias de la propia CEOE de cara a volver a entrar en una negociación, en tanto también comenzaba a mover sus propias “fichas” en función del tablero político antes que en lo relativo al mundo laboral. No obstante, desde la dirección confederal de UGT se empezaría a preparar toda una serie de materiales, así como a dividirse el trabajo y las responsabilidades por los principales temas a debate²³⁹.

Daban, pues, inicio las primeras conspiraciones al respecto del ANE. Conspiraciones, pero también reuniones –o cuanto menos primeras tomas de contacto oficiosas–. De esta forma, el viernes 20 de marzo tenía la primera reunión “oficial” a tres bandas con la presencia del Presidente del Gobierno, el presidente de la CEOE y los Secretarios Generales de CCOO y UGT. Un hecho que no volvería a tener lugar hasta tres meses después. Superado el interrogante de si CEOE optaría por asistir o no al encuentro de la Moncloa, el ambiente de tensión sería notable²⁴⁰. Más allá de las circunstancias políticas cercanas, también pesaría en el ambiente pre-reunión el fracaso que significarían las famosas “Jornadas de Reflexión” organizada por el Abril Martorell en 1978. Pese a todo, la prudencia imperaría e inclusive Calvo-Sotelo se negaría a que se fotografiara el acto, de cara a evitar cualquier tipo de posible manipulación. Un detalle no menor en ningún caso. Pero detalles aparte, lo que quedaba, por delante, no invitaba al optimismo. Entre los pocos acuerdos que saldrían de allí, se decidiría mantener las poco útiles reuniones bilaterales –en ningún caso a tres bandas en tanto CEOE y CCOO no tenían contactos– y con un temario abierto del que apenas saldrían puntos comunes acordados.

²³⁷ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 3.3.1981”, sig. 002561-002.

²³⁸ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 10.3.1981”, sig. 002561-002. En la misma acta se llegaba a indicar lo siguiente: «Se abordan temas como las implicaciones políticas de un acuerdo amplio, la voluntad del Gobierno de ir a un acuerdo sobre las rentas que nos pondría en una situación difícil, el calendario del acuerdo, las contrapartidas sindicales exigibles, los posibles contenidos concretos del acuerdo, el mecanismos de control del mismo, etc. Al tener que despejarse aún muchas incógnitas, se deja abierto el debate».

²³⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 17.3.1981”, sig. 002561-002. Por ejemplo en lo relativo al desarrollo legislativo del ET se encargarían a Jerónimo Saavedra o Manuel Chaves; y para Patrimonio Sindical a Paulino Barrabés.

²⁴⁰ Noticia, “La patronal, reticente ante la «concertación» social y económica”, *El País*, 21 de marzo de 1981.

El propio Nicolás Redondo tampoco mostraría un mayor entusiasmo por sus resultados: “Lo que no podemos hacer, en la grave situación en que se encuentra el país, es rehusar la invitación del presidente del Gobierno, aunque seamos profundamente escépticos”²⁴¹. Sin embargo, para Comisiones Obreras aquel encuentro tenía una especial transcendencia, ya que significaba reincorporarse a la primera línea de juego tras lo sucedido con el AMI²⁴². Allí no dejaría de pasar su oportunidad de remarcar su opción por el PSNCP. De hecho, un tiempo después, y todavía bajo lo que se denomina entonces como el *Síndrome Tejero*, desde CCOO se valoraría como un “hecho positivo” tan sólo la posibilidad de reunirse, aunque también se indicaba que aquellos no “podía quedarse en un gesto”. “Sólo si la voluntad de negociación estaba firmemente arraigada en los reunidos, lo que habría que demostrarse después, podrá llegarse a afirmarse que la reunión de la Moncloa significaba algo más que un gesto”²⁴³.

Posición radicalmente contraria era la de la CEOE, a quien la situación de estabilidad política por razones históricas y estrictamente económicas, les preocupaba bastante menos que a las fuerzas sindicales. Todavía más, teniendo en cuenta su tradicional enfrentamiento con la UCD y su acercamiento a marchas forzadas a AP ante la desintegración de la *opción centrista*. Como se destacaría en un *informe* de CCOO, desde la patronal, a través de sus frecuentes declaraciones durante marzo y mayo, dejaría bien claros sus recelos a negociar cualquier otro acuerdo que fuera más allá del AMI, así como a sentarse en una misma mesa con Comisiones Obreras²⁴⁴.

Más allá de las declaraciones a la prensa por parte de los principales dirigentes ugetistas tras el *pobre arranque* del 20 de marzo, en la reunión de la CEC de UGT el 24 de marzo se avanzaría notablemente en la elaboración de una posible estrategia a seguir frente a las futuras negociaciones. Si algo tiene claro la dirección ugetista es que se había que frenar las pretensiones de firmar un acuerdo social lo antes posible. Pero no sólo, pues, en aquellos momentos –según relatan Corcuera y Zufiaur– tras los primeros contactos con Comisiones

²⁴¹ Noticia, Julio Fernández, “Calvo-Sotelo busca una política de «concertación» social y económica, iniciada en torno al desempleo”, *El País*, 21 de marzo de 1981. El mismo periodista afirmaría con respecto al contenido de la mencionada reunión: «Según las versiones contrastadas por EL PAÍS acerca de lo tratado en la reunión celebrada en la Moncloa, la preocupación generalizada a todos los asistentes a la misma la constituye la posibilidad de crear falsas expectativas entre la opinión pública ante ideales medidas para acabar con el paro». En esta misma línea se expresaba el editorial del citado periódico, también aquel sábado 21 de marzo: Editorial, “¿Qué política económica?”, *El País*, 21 de marzo de 1981.

²⁴² En concreto consúltense las valoraciones al respecto de su Secretariado Confederal a los pocos días de la citada reunión: AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 31-III-1981”, sig. 002-040.

²⁴³ Noticia, “Negociaciones sobre el empleo”, *Gaceta Sindical*, nº 12, (mayo 1981), p. 6.

²⁴⁴ «El método seguido desde el 20 de marzo es exactamente el que se ha impuesto la lógica de la situación: Una patronal reticente a salir de sus relaciones bilaterales con la UGT, por un lado. Y que, por otro, deja entrever que los sindicatos sólo son interlocutores en el tema salarial; en este caso los interlocutores necesarios para la reducción salarial, dejando los demás temas ‘económicos’ al empresariado, y al Gobierno en la parte inevitable que a éste le corresponde». No ahorraría adjetivos CCOO: «Limitarse al esquema paleoliberal al que antes hemos aludido [...] parece, en estos momentos, más cerril que mezquino». Noticia, “En torno a las declaraciones de la patronal”, *Gaceta Sindical*, nº 12, (1981), pp. 7-8. La razón última de la negativa de la patronal a sentarse en una misma mesa con CCOO no escapaba a una lógica conocida por todos los implicados y que el periodista Julio Fernández, explicaba de la siguiente forma: «Curiosamente, hasta ahora la patronal no se ha visto con Comisiones Obreras, lo que se pueda interpretar, sin duda, como una clara manifestación por otra parte de CEOE de continuar profundizando en la vía de concertación bilateral establecida por UGT a través del acuerdo-marco interconfederal [...]. La postura de la CEOE, que insiste en agotar la capacidad de ponerse de acuerdo bilateralmente con UGT, es más intransigente ante la expectativa despertada en torno a los contactos que se llevan a cabo». Noticia, Julio Fernández, “La negociación de solución al paro le sirve al Gobierno para moderar los salarios de cara al Presupuesto de 1982”, *El País*, 5 de abril de 1981.

Obreras se constata como “parecen dispuestos a ir a la firma de cualquier acuerdo”. Así se deja más que claro que no pretende en ningún caso conformar “una plataforma CCOO-UGT”²⁴⁵. El riesgo de que CCOO *resucite* es todavía demasiado alto en comparación con las *pobres perspectivas* que entonces se tienen acerca de los posibles frutos de la negociación puesta en marcha. Por otra parte, los contactos con la Administración también evidenciaban el riesgo de que las negociaciones se aceleraran en aquellos mismos días. A partir de donde se toma la decisión de continuar las “reuniones bilaterales UGT-Gobierno, con el fin de desbrozar el camino, antes de levantar falsas expectativas”. Tomada tal postura, se decidiría convocar un decisivo Comité Confederal extraordinario²⁴⁶.

Es ahí donde nos encontramos con el anterior informe citado. Con una característica a destacar, pues se trata de uno de los documentos más abiertos y por tanto menos cerrados a su discusión, que se elaboraría desde la CEC de UGT en aquel tiempo. Además su importancia es doble de cara a su posible examen: primero, nos permite internarnos como pocos otros textos por las dudas y certezas en la estrategia a seguir por parte de la UGT pero también por extensión del PSOE; y segundo, describe a la perfección los problemas a los que se enfrentaría el arranque de la negociación del ANE.

De entrada, en el mencionado *informe* vendría a repetir la fórmula del PSOE de la “misión histórica del socialismo”²⁴⁷ aunque adaptada a las condiciones del mundo del trabajo:

«Este es un objetivo que compete a todas las fuerzas políticas y sindicales [profundización de la democracia] pero es necesario decir que el peso fundamental de esta tarea debe y va a recaer sobre el momento socialista y, en consecuencia, sobre la UGT [...]. La razón de esto estriba en que el movimiento socialista tiene que asumir la responsabilidad histórica que la burguesía y la derecha española, al contrario de lo ocurrido con sus homólogas europeas, no han sabido ni querido cumplir: la democracia del aparato del Estado»²⁴⁸.

Dejando aparte las incertidumbres y conspiraciones acerca del rechazó de Calvo-Sotelo de un posible Gobierno de concentración nacional propuesto por el gobierno socialista²⁴⁹; la central ugestista, de entrada y casi sin contraprestaciones inmediatas, se mostraba –como solía ser habitual– predispuesta a “soportar sacrificios e incomprensiones”. Bajo dicho presupuesto, el documento se interroga sobre qué tipo de estrategia mantener frente a la “política de concertación con la oposición” propuesta por el nuevo Gobierno. No eran pocos los riesgos a afrontar en tanto “representa un alejamiento de la posibilidad del gobierno de coalición y un fortalecimiento de la derecha en el poder”. A lo que se añadía la más que posible traición de la

²⁴⁵ Se refiere a la reunión del lunes 23 de marzo, en la que se comenzaría a elaborar un temario de lo que se definiría entonces como un *pacto contra el paro*, y en donde además se tomaría en consideración la posibilidad de aunar medidas contra las futuras políticas de fomento de empleo. Noticia, “Las centrales sindicales CCOO y UGT inician los contactos bilaterales preparatorios del pacto contra el paro”, *El País*, 24 de junio de 1981.

²⁴⁶ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 24.3.1981”, sig. 002561-002.

²⁴⁷ Véase lo apuntado en la *nota 191*.

²⁴⁸ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe que presente la C[omisión] Ejecutiva, p. 3. Confederal al Comité Confederal Extraordinario”, Madrid, 27 de marzo de 1981, sig. 002603-006, p. 3.

²⁴⁹ En el citado informe se explicitaría la postura de la Ejecutiva con las siguientes palabras: «[L]a Comisión Ejecutiva Confederal asumió la responsabilidad de apoyar la propuesta del PSOE porque creíamos que existían razones suficiente que así lo exigían, y fundamentalmente por la inmediatez y la gravedad de los acontecimientos que habían tenido lugar unas horas antes [...]. La Comisión Ejecutiva Confederal cree necesario que nuestra Organización debe apoyar como salida a la actual situación la de un Gobierno de coalición y de amplia mayoría [...]. Es más creemos que en la situación de excepcionalidad que estamos atravesando, la defensa de los intereses de los sectores populares y de los trabajadores queda más garantizada por la participación socialista en el Gobierno». AHFFLC, UGT, Secretaria de Organización-CEC, “Informe que presente la C[omisión] Ejecutiva Confederal al Comité Confederal Extraordinario”, Madrid, 27 de marzo de 1981, sig. 002603-006, p. 5.

UCD –“intenta aprovecharse de la situación, tratando de llevar esta política de concertación sin conceder contrapartidas significativas o incumpliendo los compromisos contraídos”–. En esta tesitura se partía de tres posibles alternativas: aceptar o no aceptar la negociación, en caso de aceptarla qué tipo de naturaleza, amplitud y duración tendría el acuerdo; y en tercer lugar delimitar el contenido del propio acuerdo. Entonces, *¿qué hacer?*

«La Comisión Ejecutiva Confederal quiere expresar en este documento su posición favorable y de principio a la negociación a tres bandas de un acuerdo sobre el empleo. Y es consciente de que en estos momentos, aceptar esta oferta de negociación supone aceptar la contradicción de que la misma puede consolidar a corto plazo al Gobierno de la UCD»²⁵⁰.

Políticamente maniatada, con el fin *no declarado* de interferir en los plazos estratégicos del PSOE en sus objetivos políticos, se afinaría, en extremo, lo que se denominarían las *razones tácticas* de su posición favorable a iniciar la negociación de un acuerdo social de envergadura, que tuviera la cuestión del empleo por objeto principal. Las citadas *razones tácticas*, iban desde el llamamiento a la coherencia, pasando por cuestiones de imagen –“resultaría muy difícil [...] explicar a los trabajadores y a la opinión pública un rechazo a un acuerdo de esta naturaleza”– pero sobre todo estaban destinadas a resolver un posible obstáculo en su camino hacia la hegemonía sindical: “[L]a negativa de la UGT abriría un enorme espacio a CC.OO, que con toda seguridad entrará en la negociación tratando de recuperar la credibilidad perdida cuando quedó marginada de la negociación del AMI”²⁵¹. A lo anterior se sumaba una relevante “razón estratégica”: frente a los duros datos del paro –tan sólo en mes de enero de 1981 se habían destruido más de 2.000 empleos por día– no quedaba más remedio que lanzar una “política ofensiva contra el desempleo que respondiera al principio de solidaridad necesario con un sector de la clase trabajadora”²⁵². Una política de solidaridad que ayudara a romper el creciente corporativismo sindical: “Es necesario señalar que por causa que no hemos podido superar, la actividad sindical, ha estado atrincherada en las reivindicaciones salariales que respondían involuntariamente a un corporativismo sindical que rompía la solidaridad con los trabajadores desempleados”. Sin ningún género de duda, algo empezaba a moverse en los postulados políticos de la propia UGT. Un giro que tendría su culminación en 1983 a través de su XXXII Congreso Confederal²⁵³.

No termina ahí el *informe*. En su última parte se detenía en una extensa valoración sobre las dificultades y riesgos de la posible negociación. Primero que una vez puesta en marcha “va a ser muy difícil nuestra salida”. A lo que se añadía, al menos, otras dos: la primera, la repetición

²⁵⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría General, “Informe que presente la C[omisión] Ejecutiva Confederal al Comité Confederal Extraordinario”, Madrid, 27 de marzo de 1981, sig. 002603-006, p. 8.

²⁵¹ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría General, “Informe que presente la C[omisión] Ejecutiva Confederal al Comité Confederal Extraordinario”, Madrid, 27 de marzo de 1981, sig. 002603-006, p. 9. En otra parte del documento no se tendría reparo alguno en señalar la *falsa* estrategia a seguir durante la negociación: «En segundo lugar, que la actitud más dura a lo largo de la negociación va a corresponder a la UGT, y que esta actitud puede ser manipulada por el gobierno a través de los medios de comunicación. Esta afirmación no es gratuita, porque es previsible que CCOO va a estar dispuesta a firmar un acuerdo a cualquier precio porque en estos momentos le interesa política» (p. 11).

²⁵² Los datos manejados por el informe eran aterradores: «[E]l número de parados en 1980 superó la cifra de 1.600.000 trabajadores (12,6%) según la última EPA [...]. Según la misma EPA los jóvenes en paro alcanzan la cifra de 900.000, de ellos 700.000 buscan un primer empleo. Si pasamos a la cobertura del desempleo nos encontramos que solo el 40% de los desempleados cobran el seguro. Pero lo más grave viene a ser que estas cifras [siguen incrementándose] a velocidad alarmante: si en 1980 la media diaria de parados fue de 1.000 trabajadores, es necesario señalar que en los cuatro últimos meses de dicho año fue de 1.400; y según los últimos datos en el mes de enero de 1981, la media diaria fue de 2.000 trabajadores». AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría General, “Informe que presente la C[omisión] Ejecutiva Confederal al Comité Confederal Extraordinario”, Madrid, 27 de marzo de 1981, sig. 002603-006, pp. 9-10.

²⁵³ Nos remitimos aquí al apartado “10.2.1.1. El XXXIII Congreso de la UGT: el «bautismo» en la lógica de la modernización socialista (junio 1983)”.

del posible intento de instrumentalización de UCD, y la segunda que frente a los posibles sacrificios, “quedarán claras las posibles contrapartidas”. La memoria histórica viva de los Pactos de la Moncloa todavía estaba muy viva –“[L]os Acuerdos de la Moncloa, constituye un antecedente significativo”–. No quedaba más remedio, vistas las cosas de esta forma, que ir a un pacto social con todas sus consecuencias en donde, primero, se asegurara “un control de cumplimiento de los compromisos contraídos”, y segundo se estableciera “un calendario de ejecución”. Pero a su vez también tocaba reflexionar en torno al *contenido*. Dos opciones se avanzaban: “Un acuerdo limitado en cuanto a su contenido” o “[u]n Acuerdo global sobre el empleo”. Pocas dudas habría en aquella ocasión: “En consecuencia, si queremos ser coherentes con el principio de solidaridad, si queremos desarrollar una política ofensiva que detenga la caída del desempleo, lo que pasa por la exigencia de inversiones públicas y privadas, la UGT debe optar por un acuerdo global sobre el empleo”, según la CEC de UGT.

El citado informe terminaría, por último, indicando las dos orientaciones claves que constituían los puntos de agarre de una posible negociación: la primera, la del fortalecimiento institucional de los sindicatos; y en la segunda, quedaba evidenciada su siempre predisposición al sacrificio –y casi por extensión al auto-sacrificio– en relación a la cuestión salarial, sabiendo que esta misma cuestión podía llegar a constituir el principal escollo de cualquier tipo de negociación en aquel contexto de elevada inflación. Su tesis *del salario por empleo* cobraba forma:

«Es evidente que el tema salarial va a ser uno de los puntos clave en la negociación y sobre el cual se tiene que pronunciar el Comité Confederal. Simplificando de alguna manera la frase ‘salario por empleo’ puede resumir una actitud de dar prioridad a los temas de empleo en estos momentos [...]. [D]icha política pasa necesariamente, entre otros factores, por una reducción salarial y este es uno de los retos más importantes al que se tiene que enfrentar nuestra Organización»²⁵⁴.

Los frentes a los que atender se multiplicarían en los siguientes días a la celebración de aquel Comité Confederal extraordinario. A pesar de que existe un nuevo vacío de cerca de un mes en las actas de la CEC de UGT –desde el 24 de marzo al 17 de abril– contamos con otro tipo de documentación primaria, que nos permite seguir, a grandes rasgos, los principales acontecimientos en tal tiempo.

De entrada, se iniciaría una ronda de contactos con Comisiones Obreras, desde la perspectiva apuntada en el anterior informe. Mucho se cuidaría desde UGT las formas en aquellos primeros movimientos claves debido a las deterioradas relaciones con las propias Comisiones Obreras. Así el 28 de marzo tendría lugar la primera reunión de carácter preeminentemente político, tras la toma de contacto del día 23 de marzo. Allí asistirían Sartorius, Corell por CCOO y Chaves y Zufiaur por UGT. No era poco, por más que tan sólo fuera un pequeño paso. En dicha reunión se acordaría un “temario a desarrollar” sin mayores dificultades. Inclusive se lograría sacar un comunicado conjunto al respecto de las negociaciones sobre el empleo abiertas. No se trataba de una plataforma ni ningún tipo de unidad de acción, pero cuando menos parecía poder establecerse otra posible dinámica distinta al habitual enfrentamiento²⁵⁵.

²⁵⁴ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe que presente la C[omisión] Ejecutiva Confederal al Comité Confederal Extraordinario”, Madrid, 27 de marzo de 1981, sig. 002603-006, pp. 13-14.

²⁵⁵ «UGT y la CS de CCOO reafirman la necesidad de llegar a un acuerdo satisfactoria sobre el empleo dirigido a frenar el ritmo ascendente del desempleo en base de crear puestos de trabajo, así como lograr un mayor cobertura de los parados. Ambas centrales constatan la insuficiencia en la concreción de las propuestas por parte del Gobierno, al tiempo que muestran su preocupación por las reticencias que se observan en distintos frentes a tomar nuevas medidas económicas que permitan afrontar con eficacia el problema del desempleo. Por otra parte, CCOO y UGT entienden que mientras duren las actuales conversaciones y sobre los temas motivos de discusión, no se deben tomar medidas unilaterales, ya que ello dificultaría las mismas». “Unidad ante el empleo”, *Gaceta Sindical*, nº 12, (1981), p. 5.

No más de cinco días después tendría lugar una segunda reunión también de perfil político, pero ahora con la inclusión de elementos técnicos. Julián Ariza, Agustín Moreno, Carlos Elvira, Héctor Maravall y Miguel González Zamora integrarían la delegación de CCOO. Por parte de UGT asistirían Manuel Chaves, Paulino Barrabés y Armando Caro. También allí se constatarían unos amplios puntos de acuerdo, empezando por el Patrimonio Sindical, el reforzamiento de la presencia institucional de los sindicatos, e inclusive quedaba clara la necesidad de empezar a plantear alternativas urgentes a los planes elaborados por el Ejecutivo, de cara al desarrollo legislativo del ET²⁵⁶.

A falta de las actas de las reuniones de la CEC de UGT como indicábamos, contamos, sin embargo, con una serie de *informes* de la Secretaria de Acción Reivindicativa –dirigida entonces por José Luis Corcuera– que nos ayudan a internarnos por la marcha de las negociaciones en relación, precisamente, al desarrollo legislativo propuesto del ET. En primer lugar, se ha de reseñar un *informe técnico interno* fechado el sábado 28 de marzo, y en donde se dan cuenta de las reuniones que se habían mantenido entre el Ministerio de Trabajo y la propia UGT, en relación a la contratación temporal como uno de los pilares del futuro ANE. La idea principal que subyace del mismo es la siguiente: las cada vez más definidas prioridades gubernamentales, así como sus sobrevenidas prisas, de cara a avanzar al ritmo que fuera en el desarrollo legislativo del artículo 17.3 del ET. Una hipótesis que se confirma ante la avanzada redacción del futuro *pack legislativo* de junio de 1981 que allí se desbroza²⁵⁷. Una estrategia que, en buena medida, respondía a las siguientes hipótesis: primero, recuperar la iniciativa política y ofrecer una imagen de cierta estabilidad institucional; y segundo, frenar cualquier tipo de acercamiento entre los dos principales sindicatos de clase del país.

No era la primera vez que el Gobierno ponía sobre la mesa aquellas propuestas, pues tal y como se indicaba en el citado *informe*, en la temprana fecha de noviembre de 1980 las mismas ya habían sido consultadas con UGT, en base a los propios preceptos contenidos en el artículo 17.3 del ET. Como se ha avanzado, por el temario tratado se podía constatar el alto grado de avance al respecto. Un primer bloque estaba destinado a las relaciones laborales –en concreto los programas de fomento del empleo, los contratos a tiempo parcial y los contratos en prácticas, junto con el reglamento del LBE en materia de prestaciones, entre otros asuntos– y el segundo bloque estaba destinado a la reestructuración del INEM.

El resumen de la situación así como de las posiciones adoptadas presentaba el siguiente esquema de partida: la postura de UGT venía a patrocinar una posición favorable al desarrollo de la política de fomento del empleo, aunque limitada y con las suficientes garantías normativas. Así por ejemplo, en relación a los programas de fomento del empleo se podía leer lo siguiente: “Es conveniente precisar que los jóvenes trabajadores pueden ser [contratados] en estos programas aún cuando antes hubieran trabajado bajo un contrato para la formación”. También se mostraba partidaria de incrementar las bonificaciones a las empresas que “contraten a desempleados no perceptores de subsidio”, aunque dejaba claro que las “empresas que hayan realizado despidos calificados de improcedentes y no readmitan, no deben beneficiarse de estos programas”.

Con respecto a los contratos a tiempo parcial, la preocupación de la central socialista era garantizar los mismos derechos –contemplados en el mismo artículo 12 del ET– que frente al resto de las figuras contractuales. Así se añadía como la Administración “[t]omó nota de las observaciones de UGT, a las que valoró (globalmente) como razonables”. Lo que no evitaría presentar el siguiente inciso: “También es preciso reflexionar sobre las cautelas precisas para evitar que las empresas puedan «reconvertir» plantillas a tiempo completo, por este nuevo tipo

²⁵⁶ “Acuerdo entre centrales”, *Gaceta Sindical*, n° 12, (1981), pp. 6-7.

²⁵⁷ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Reivindicativa, “Reuniones del Ministerio de Trabajo-UGT”, Madrid, 28 de marzo de 1981, sig. 002212-003. A la reunión asistiría: Miguel Cuenca (Dirección General de Empleo), y el Director General del INEM y por parte de UGT Jerónimo Saavedra, Pedro Guardado y Armando Caro.

de contratos”. Por último, con respecto a los contratos de trabajo en prácticas y para la formación –artículo 11 del ET– se indicaba como el “[p]royecto del Gobierno es técnicamente malo”.

Que la estrategia de UCD pasaba por acelerar al máximo las negociaciones y poder presentar lo antes posible un acuerdo social, lo evidenciaría la reunión de altos técnicos y políticos de UGT y el PSOE celebrada el 31 de marzo, para debatir el futuro Acuerdo Nacional de Empleo cuya nominación parecía que iba a ser así finalmente²⁵⁸. La reunión no dio mucho de sí en términos de contenidos. Se llegaría a afirmar textualmente: “Se abordaron en un principio de manera desordenada una serie de puntos que si bien son de interés hicieron poco avanzar la reunión”.

Poco o nada se hablaría de la contratación temporal, centrando la mayor parte de la reunión en la estricta cuestión salarial. Pese a lo anterior, la misma resulta de interés ya que queda claro el objetivo del Ejecutivo de Calvo-Sotelo de “conseguir que las Centrales acepten una bajada espectacular de los salarios que produzca un verdadero impacto psicológico, que condicione una bajada de las expectativas de inflación para el 82”. Los datos que se manejaban por parte del Gobierno pasaban, así, por “estabilizar la inflación en un 11% con unos salarios en el 9%”²⁵⁹. También se dejaba deslizar como “García Díez [Ministro de Economía] parece estar deseando que UGT haga una lista de lo que no quiere, de lo que no está dispuesta a aceptar, para clarificar la negociación”. A partir de ahí, de nuevo, quedaba evidenciado como el principal riesgo era “pactar muy pronto”²⁶⁰.

No obstante, la citada reunión sí proporcionaría una radiografía de las dos posturas centrales del dentro del socialismo español en este tipo de negociaciones. Por un lado, las de Boyer y su equipo predispuestos a firmar cuantos antes, centrándolo en torno a la estrategia del PSOE de la conquista del poder político “[N]o firmar puede tener consecuencias políticas indeseables. No es este un momento en el que se pueda dar un pulso muy fuerte con el Gobierno”. Siempre pragmático propondría Boyer preparar un paquete de “cosas que pedir, distinguiendo las que no son factibles con este Gobierno, las que no van a decir que no, y las que firmarán pero luego no cumplirán”²⁶¹. No sería, en aquella ocasión, la opción más respalda.

²⁵⁸ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Reivindicativa, “Reunión de los Técnicos UGT-PSOE. Acuerdo Nacional de Empleo”, Madrid, 31 de marzo de 1981 [redactada por a.c. seudónimo de Armado Caro Figueroa], sig. 002212-13. Una reunión de alto nivel en donde asistirían los principales estrategas económicos y laborales del socialismo español: Armado Caro, Pedro Guadeño, Julio Rodríguez, Miguel Boyer, Paulino Barrabés, [Cándido] Méndez, Ordoñez, Alejandro Cercas, Carlos Solchaga, José María Zufiaur, Oliva, José Luis Corcuera, Manuel Chaves, Javier Solana, Juan Manuel Kindelán, Julián García Vargas.

²⁵⁹ Una tesis también confirmada por la propia prensa progresista-liberal a los pocos días. El periodista de *El País* Julio Fernández, probablemente bien asesorado, destacaba en la importante edición dominical, como pese a que no existía ni temario ni metodología, el «Gobierno persigue la inmediata firma de dicho documento con el fin de abordar, dentro del plazo que finaliza el presente mes, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 1982 sobre la base de un determinado nivel de crecimiento salarial para los funcionarios fijado de acuerdo con la moderación salarial que centraría el deseado documento». De hecho, en aquel reportaje se llegaría a hablar directamente de la «obsesión gubernamental por recortar salarios es tal que en el primer planteamiento formal de posibles temas con los sindicatos para acabar con el paro se pretende que los sindicatos renuncien a la revisión semestral pactada en los convenios para este año». Noticia, Julio Fernández, “La negociación de solución al paro le sirve al Gobierno para moderar los salarios de cara al Presupuesto de 1982”, *El País*, 5 de abril de 1981.

²⁶⁰ Escasa sería la información que se empezaría a filtrar a la prensa en relación con los primeros contactos: Noticia, “El ministro de Economía prosigue las reuniones bilaterales sobre el paro”, *El País*, 3 de abril de 1981.

²⁶¹ En aquella ocasión incluso Carlos Solchaga se desmarcaría de las tesis del propio Boyer. Así lo recogía la citada acta: «Solchaga hizo una intervención más bien política analizando que se estaba rechazando toda la política de UCD y muy en particular la económica y esto nos ponía en una situación difícil, sin contar que por otra parte que nos encontrábamos en una tenaza entre CCOO y el Gobierno,

Dirigentes socialistas cercanos al propio Boyer como Solchaga o Solana manifestarían que no se podía “firmar a cambio de nada”, indicando el propio Solana “es el peor servicio que podemos hacer a la causa de la democracia”.

Una posición lógica, pues como destacarían dirigentes como Corcuera o Armado Caro no sólo era necesario cuantificar las propuestas sino de dotarse de una metodología y una filosofía de la negociación. Igualmente en dicho encuentro Enrique Barón o Julián Vargas defenderían como cualquier posible acuerdo pasaba por conseguir un mayor poder sindical²⁶². Asimismo también habría espacio para la discusión en torno a la flexibilidad del mercado de trabajo. La propuesta correría a cargo de Álvaro Espina –uno de sus mayores impulsores dentro del socialismo español– quien propondría una mayor flexibilización en relación a la contratación temporal a cambio de mayor cobertura de desempleo²⁶³. Una *idea-fuerza* que iría tomando acomodo en el seno del socialismo en los siguientes meses y años.

Según avanzaban las negociaciones más palpable parecía que el objetivo primordial del Ejecutivo de UCD consistía, en lo básico, en flexibilizar lo máximo posible la contratación temporal por la vía del artículo 17.3 del ET. Un elemento que explicaría los posteriores “acuerdos secretos” así como la “fórmula de compromiso” con la que se obtendría *in extremis* la firma de CCOO y UGT del ANE. Mientras tanto, según pasaban las semanas, desde UGT irían disminuyendo las expectativas, conformándose, de hecho, con eliminar los elementos más radicales de los futuros Reales Decretos. Así cuando todavía quedaba un trecho para firmarse el ANE un 9 de junio, nuevamente, desde la Secretaria de Acción Reivindicativa se elaboraba un nuevo informe sobre la marcha de las negociaciones titulado: “Las negociaciones sobre el empleo”²⁶⁴, fechado un 15 de abril antes del inicio de la Semana Santa de aquel año.

Por su parte, las reuniones bilaterales entre CEOE y UGT seguían su marcha, sin aparentes resultados ni avances significativos; como también continuaban las negociaciones entre Comisiones Obreras y el Ministerio de Economía y Trabajo. En tal marco descentralizado de diálogo, los agentes sociales parecían tomarse con una aparente tranquilidad las mismas, pues anunciarían a principios de abril que cualquier mesa de negociación a tres bandas se dejaría para después de la Semana Santa²⁶⁵. En realidad, sobre aquellas reuniones se sabría bien poco a través de la prensa. Escasas serían las filtraciones a la misma a través siempre de las llamadas “fuentes solventes”.

pero que por otra parte no podíamos minusvalorar nuestra situación de partida, y que en consecuencia no podíamos aceptar cualquier cosa». AHFFLC, UGT-Secretaria de Acción Reivindicativa, “Reunión de los Técnicos UGT-PSOE. Acuerdo Nacional de Empleo”, Madrid, 31 de marzo de 1981 [redactada por a.c. seudónimo de Armado Caro Figueroa], sig. 002212-13.

²⁶² La debilidad organizativa pero sobre todo financiera de los principales sindicatos era una realidad. Así en medio de las negociaciones del ANE se conocería como el Banco Exterior de España, con el apoyo del Gobierno avalaría un crédito de 280 millones de pesetas a Comisiones Obreras. Por más que las razones técnicas argumentadas eran que el citado crédito se daba en función de la futura devolución del patrimonio sindical, coincidía las mismas con las negociaciones del ANE. Todo un adelanto de lo que vendría después. Noticia, Julio Fernández, “El Gobierno avala un crédito bancario de 280 millones de pesetas a CCOO”, *El País*, 19 de abril de 1981.

²⁶³ «Los argumentos de Álvaro Espinosa [fueron] que a cambio de una mayor cobertura del desempleo se podía aceptar algunas medidas destinadas a flexibilizar el mercado de trabajo, concretamente en el aspecto de movilidad de los trabajadores [...]. Entre todos los colectivos en paro, sería necesario establecer una lista de prioridades: ¿jóvenes en busca de su primer empleo? ¿mujeres que acceden por primera vez al mercado de trabajo? ¿mayores de 45 años?». AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Reivindicativa, “Reunión de los Técnicos UGT-PSOE. Acuerdo Nacional de Empleo”, Madrid, 31 de marzo de 1981 [redactada por a.c. seudónimo de Armando Caro Figueroa], sig. 002212-003.

²⁶⁴ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Reivindicativa, “Las negociaciones sobre el Empleo”, Madrid, 15 de abril de 1981 [redactado por a.c. seudónimo de Armando Caro Figueroa], sig. 002212-003.

²⁶⁵ Noticia, “Nueva ronda de conversaciones entre sindicatos, patronal y Administración”, *El País*, 7 de abril de 1981.

Con todo, no faltaría algún que otro movimiento durante las dos primeras semanas de abril. El día 14 de abril se conocía como el Ejecutivo estaba dispuesto a poner encima de la mesa 200.000 millones con el objetivo de mejorar la cobertura del desempleo. Con la condición de que los incrementos salariales se situaran, al menos, dos bajos por debajo del IPC previsto²⁶⁶.

En cualquier caso, la inquietud del Gobierno por la lenta marcha de las negociaciones era evidente. A través de la filtración a la Agencia EFE de los borradores para el desarrollo legislativo del ET y de la reforma de la LBE un 15 de abril, trataría de meter presión. De hecho, se informaría como, con o sin acuerdo, el nuevo reglamento de la Ley Básica de Empleo se aprobaría en el Consejo de Ministro del día 24²⁶⁷. Un primer órdago que se quedaría en nada.

Pero volviendo al citado anterior informe *Las negociaciones sobre el empleo* con fecha, precisamente, del miércoles 15 de abril, en el mismo se dedicaba su primera parte a lo que se denominaban las “Medidas de política económica”, en donde entre otros puntos se hablaba de “la creación de 170.000 mil empleos en 1982”. Se indicaba también como el “Gobierno parece receptivo a las demandas de UGT, si bien hay diferencias importantes sobre las cantidades a presupuestar”. En el terreno de las programas de fomento del empleo, UGT seguía manteniendo sus criterios “clásicos” al respecto. Por un lado, potenciar las contrataciones indefinidas y a tiempo completo, mientras que, por otro, se exigían medidas de cara a *exclure* de los posibles beneficios a las “empresas que efectúen despidos individuales improcedentes”, aunque nada se decía de su instrumento más empleado: los Expedientes de Regulación de Empleo. La única y tenue diferencia con CCOO en ese instante se situaba en la posición de esta última de fijar tasas porcentuales por contratos temporales y centros de trabajo. Una posición que, en breve, pasaría a formar parte de la agenda negociadora de la propia UGT. E igualmente con respecto a los contratos a tiempo parcial, se seguía manteniendo la misma postura. Y en relación a los contratos para la formación y prácticas no se ahorraban los comentarios, al indicar como “la propuesta gubernamental era francamente insuficiente y inadecuada”.

Lo cierto, es que a la vuelta de las vacaciones de aquella Semana Santa pronto se conocería como las negociaciones estaban “completamente estancadas” según sindicatos y patronal, o iban a “paso lento” según la Administración. No faltarían desde entonces y hasta final del propio mes de abril los rumores de que se podía reproducir la situación del AMI. La *jugada* de la CEOE pasaba en dichos instantes por tratar de negociar la totalidad del futuro ANE con UGT a través de reuniones bilaterales, con el fin de marginar a CCOO. A contribuir aquella imagen se sumaría el acuerdo sobre empleo firmado en esos mismos días Fomento del Trabajo Nacional –la patronal catalana– y UGT para Cataluña²⁶⁸. Pese a que Manuel Chaves, entonces Secretario de Prensa e Información de UGT, saliera al paso al día siguiente de tales movimientos, en el aire quedaba la sensación de que la historia tantas veces repetida se podía volver a dar²⁶⁹.

De ahí, en adelante, el panorama político y estrictamente negociador no haría sino empeorar, hasta su bloqueo y rupturas parciales. Por más que tanto desde UGT como desde CCOO se alabará a posterior la *unidad de acción* alcanzada en torno al ANE en los meses

²⁶⁶ Noticia, “El Gobierno quiere dedicar 200.000 millones de presupuesto contra el paro”, *El País*, 14 de abril de 1981.

²⁶⁷ Noticia, “El Gobierno publicará en breve cuatro decretos de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores”, *El País*, 16 de abril de 1981.

²⁶⁸ Noticia, “Estancadas las negociaciones tripartitas sobre el paro”, *El País*, 24 de abril de 1981.

²⁶⁹ Noticia, “UGT quiere que CCOO negocie también con la CEOE el pacto sobre el empleo”, *El País*, 25 de abril de 1981. En paralelo a toda esta serie de movimientos y reuniones José María Cuevas – Secretario General de la patronal– se mostraría profundamente escéptico en aquellos días. Especialmente a la hora de asegurar la posibilidad de un futurible acuerdo social. Véase, al respecto, Noticia, “Negociaciones para acabar con la «economía golfa»”, *El País*, 26 de abril de 1981; Noticia, “Hasta ahora no ha habido discusiones efectivas sobre cómo mejorar el nivel de empleo, según la CEOE”, *El País*, 26 de abril de 1981.

siguientes a su firma; lo cierto es que la central socialista jugaría el papel que había venido practicando desde el inicio de la transición. Es decir, reuniones bilaterales –secretas o no o como se mencionaba en los documentos “reservadas”– con Gobierno y la CEOE, e intentos de marginar y/o dejar en un plano secundario a CCOO, hasta tener garantizada sus correspondientes contrapartidas. Con las mismas, por otro lado, por primera vez se manifestarían conjuntamente los dos principales sindicatos de clase en el 1º de Mayo de 1981. Un paso siempre reclamado por Comisiones Obreras quien tan sólo a través del trabajo conjunto con el otro gran sindicato de la nación, veía la posibilidad de desterrar el *fantasma del golpismo* y superar la situación de crisis económica²⁷⁰.

En una reunión del Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores, prácticamente, monográfica sobre el ANE celebrada el 28 de abril, Zufiaur y Corcuera –principales cabezas negociadoras– dejaban más que constatado que la CEOE, primero, no quería “sentarse a una Mesa junto con CCOO”, a la par que se mostraban las hondas divergencias con la patronal. Todavía más, pues se afirmaba como “[p]odría incluso llegar a pensarse que la CEOE está intentando invalidar la posibilidad de un acuerdo global a tres bandas”. Frente a tal planteamiento en donde se advertía como era inviable en dichas circunstancias un posible acuerdo –postura que mantendría Jerónimo Saavedra– el propio Nicolás Redondo desbrozaría las líneas maestras a seguir: primero, la de “mantener la filosofía de un acuerdo global con garantías de cumplimiento y con contrapartidas sólidas”; segundo, “convocar cuando antes una reunión con CCOO para ver cuáles son la divergencias últimas o coincidencias en el campo sindical y en el campo económico”; pero sobre todo “dar fin a la serie de reuniones bilaterales”. No obstante, ni el propio Redondo destacaría por aquellas alturas la posibilidad de abandonar las negociaciones –posición rechazada en el Comité Confederal extraordinario del 27 de marzo– en caso “de no poder llegar a un acuerdo global satisfactorio”²⁷¹.

A finales de abril de 1981 también desde Comisiones Obreras realizaría su particular balance, de cara a evaluar la primera etapa del proceso negociador y con la celebración del 1º de Mayo a la vista. Aunque en lo programático las diferencias con UGT existían por mínimas que fueran, estas eran mucho menores que en lo estratégico. Vaya por delante, en todo caso, que la capacidad de obtener información confidencial o de alto valor por parte de CCOO siempre sería mucho menor que la de UGT, tanto por razones partidistas como por las propias relaciones personales de la central ugetista con la CEOE.

Consciente tanto de esta precariedad de medios como en lo relativo a su débil posición político-estratégica, volvería a valorar positivamente el inicio de las reuniones bilaterales que con tanta cautela veía la propia UGT²⁷². Así se desprende de la resolución de la CEC de CCOO del 21 y 22 de abril. Primero, se observaba como con tal marco negociador generado se abría la sola posibilidad de introducir y defender su PSNPC: “Es de una importancia trascendental para nuestro país en todos los órdenes [...] afrontar con energía el problema del paro, mediante acuerdos entre las fuerzas económicas y sociales y el Gobierno”. Ahora bien, al igual que su homóloga UGT comprobaba como tras no pocas reuniones, como tan sólo se había ido

²⁷⁰ A partir de las anteriores líneas interpretativas debe leerse parte del discurso de Marcelino Camacho del 1º de Mayo: «La unidad que preside esta manifestación del 1º de Mayo y que encabezamos CCOO y UGT, debe mantenerse y desarrollarse; para impulsar la acción de los trabajadores, para conseguir un plan solidario contra el paro y contra la crisis, para defender la libertad, para consolidar y desarrollar los sindicatos representativos, pilares básicos de la democracia». Noticia, “1º de Mayo unitario. CCOO y UGT, contra el paro y por la libertad”, *Gaceta Sindical*, nº 12, (1981), p. 4.

²⁷¹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 28.4.1981”, sig. 002561-002.

²⁷² Incluso CCOO se llegaría a reunir con el PSOE en un inusual gesto a finales de marzo de 1981. Una reunión distendida y en donde predominaría el intercambio de puntos de vistas y no pocas coincidencias. Noticia, “El PSOE y CCOO, de acuerdo en la negociación a tres bandas sobre empleo”, *El País*, 26 de marzo de 1981.

contrastando “algunas opiniones de carácter técnico”. Tocaba pues, “reorientar el proceso de negociación entre las distintas fuerzas”. Pero ante todo para Comisiones Obreras el proceso abierto significaba la posibilidad de acercarse a UGT y a su vez introducir *cuñas* en su ahora no fácil relación con la CEOE. He aquí el gran valor otorgado por CCOO a las negociaciones del ANE. Un paso clave de cara a garantizar que el posible y futurible acuerdo social también contuviera las suficientes contrapartidas, que hicieran viable su firma. “[S]e ha valorado positivamente el nivel de coincidencia alcanzado con UGT en torno a los contenidos que deberían ser objeto de negociación”. Añadiendo: “En esta dirección debe avanzarse para lograr alternativas conjuntas apoyadas por ambos sindicatos en el transcurso de las negociaciones”. Una aproximación a la *unidad de acción* que además se reforzaba con la denuncia de la actitud “egoísta” de la patronal: “La CE de CCOO ha constado con preocupación la actitud de la gran patronal, CEOE, con sus reiteradas reservas, dificulta el logro de un acuerdo sobre empleo en función de intereses nacionales y por encima de cualquier otro interés particular o de grupo”. Todavía más. Superada su tradicional *soledad sindical*, Comisiones Obreras se mostraba dispuesta, por vez primera, a hablar de las propias “aportaciones salariales de los trabajadores”, eso sí, “sobre la inequívoca base del reparto justo de los sacrificios entre todos los sectores sociales, teniendo como contrapartida la creación neta de puestos de trabajo”²⁷³.

Por lo demás, y en relación a las medidas legislativas propuestas –ya en otra serie de documentos– se hablaba, en primer lugar, sobre el proyecto de contratación juvenil, como “ya se ha retirado [el proyecto original] por la Administración, con intención de preparar un nuevo proyecto”. Igualmente desde CCOO no se escatimarían críticas del resto de los proyectos de decretos presentados, en base a las tesis mantenidas en el PSNPC, al denunciar, de forma abierta, el riesgo de incrementar con los mismos las tasas de temporalidad y la mera subvención pública por el hecho de contratar:

«Los decretos de tiempo parcial y programas de empleo tienden a abaratar el empleo con subvenciones públicas y a incrementar su carácter temporal. El criterio expuesto por CCOO es que tanto la subvención pública como el trabajo a tiempo parcial deben estar destinados a la creación de nuevos puestos de trabajo, favoreciendo a los trabajadores con más dificultades para acceder al empleo»²⁷⁴.

Los primeros días de mayo no depararían grandes sorpresas. Quizás resaltaría la doble posición mantenida por la UGT. Al día siguiente del 1º de Mayo, Redondo efectuaría unas *singulares* declaraciones a *El País*: “[L]levados por móviles egoísta, podríamos llegar a un acuerdo sobre el paro solamente con la CEOE e invitar después al Gobierno y a Comisiones Obreras a que sumen a él”. Para añadir: “pero creemos que no es bueno marginar a la otra central mayoritaria”. Todo ello con un mensaje final: “La patronal negociará con CCOO si va

²⁷³ AHT, CCOO-CEC, “Resolución de la Comisión Ejecutiva Confederal de los días 21/22-IV-1981”, sig. 001-00014. Dentro de esa misma serie “Comunicado. Conversaciones entre Sindicatos, Gobierno y Patronal en torno al problema del paro”. La citada resolución sería publicada en: “Resolución de la Comisión Ejecutiva Confederal. Análisis de las conversaciones bilaterales”, *Gaceta Sindical*, nº 12, (1981), p. 11.

²⁷⁴ “Reuniones con el Ministerio de Trabajo”, *Gaceta Sindical*, nº 12, (mayo 1981), pp. 9-10. E igualmente, consúltense, los balances de las reuniones tanto con el Ministerio de Trabajo como con la UGT durante los meses de marzo y abril: AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 7-IV-1981”, sig. 002-041; AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 14-IV-1981”, sig. 002-042. Una semana después y tras la reunión de la CEC de CCOO se calificaría al proyecto gubernamental como de ‘negativos globalmente’. “Resolución de la Comisión Ejecutiva Confederal. Análisis de las conversaciones bilaterales”, *Gaceta Sindical*, nº 12, (1981), p. 11.

acompañada por UGT”²⁷⁵. Declaraciones que se producían en un momento de parcial parálisis del proceso negociador²⁷⁶.

Pese a la propia petición del Secretario General de UGT de poner fin a las reuniones secretas –y/o “reservadas”, según se prefiera– estas continuarían durante buena parte del mes de mayo²⁷⁷. Asimismo se mantendrían las dudas sobre abrir o no a CCOO la posibilidad de participar en las negociaciones del ANE, a la par que se ocultaba a la otra confederación sindical el documento base remitido por el Gobierno a la propia UGT. Tampoco se abandonaría la idea –al menos, en las tres primeras semanas del propio mes de mayo– de una posible retirada del ANE²⁷⁸. De la misma forma, y en medio de la siempre débil política de concertación entre UCD y el PSOE sobre los Estatutos de Autonomía, los principales puntos de debate, o mejor dicho de desacuerdo, se reducían a la “cuantificación de los puestos de trabajo exigibles, la fijación de una banda salarial o de una cifra única [...] qué postura mantener ante las pensiones y las retribuciones de los funcionarios”²⁷⁹.

Tal era la situación de bloqueo –y ello en una coyuntura cada vez más marcada por el “silencio” informativo por todas las partes– que tras la reunión de la CEC de 19 de mayo, se convocaría una rueda de prensa para denunciar públicamente la ahora ya estructural parálisis de las negociaciones. Allí se fijaría más claramente la propia posición de UGT: el posible acuerdo pasaba por dos puntos básicos: la cuantificación de la creación de empleo y la mejora de la cobertura de contemplada en la propia LBE. A partir de ahí se mostraba abierta a la posibilidad de llegar a una nueva reducción salarial basada en una inflación prevista del 12% en base a un incremento salarial del 10%. Tanto en la rueda de prensa como en las citadas actas poco o nada se mencionaría en relación a la propia expansión de la contratación temporal, dejando, por el momento, el asunto destinado al compromiso de la CEOE de crear 100.000 puestos de trabajo mediante los contratos de formación y prácticas; y, por otro lado, que el Gobierno asegurará la subvención de 120.000 contrataciones de parados que hubieran agotado el subsidio. Dicho eso, se reclamaba también por parte del Ejecutivo que se estableciera un calendario de negociaciones formales²⁸⁰.

Pero antes de entrar en la fase final de la negociación del ANE, resulta de interés detenerse, aunque sea brevemente, en cómo afrontó la CEOE aquella negociación. Gracias a varios documentos de trabajo confidenciales –en su mayor parte– localizados a través de la Secretaria de Acción Institucional –dirigida entonces por José María Zufiaur– y a través de la Secretaria de Acción Reivindicativa –encabezada por José Luis Corcuera– podemos reconstruir someramente las posiciones de la patronal al respecto. En primer término, indicar que la patronal se tomó aquella negociación con una evidente falta de interés. Verificados los límites de su capacidad de penetración e influencia en el seno de la UCD en repetidas ocasiones, su análisis de las consecuencias del *Golpe de Estado* y de sus posteriores ramificaciones, le conducirían, antes que nada, a ir adelantándose a los *nuevos tiempos políticos* que se avecinaban.

²⁷⁵ Noticia, “«No es bueno marginar a CCOO de las negociaciones tripartitas contra el paro», según Nicolás Redondo”, *El País*, 2 de mayo de 1981.

²⁷⁶ Véase también, Noticia, “La financiación frena los acuerdos sobre el empleo, según la Administración”, *El País*, 3 de mayo de 1981.

²⁷⁷ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 5.5.1981”, sig. 002561-002.

²⁷⁸ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 11.5.1981”, sig. 002561-002.

²⁷⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 19.5.1981”, sig. 002561-002.

²⁸⁰ Noticia, “Los contactos bilaterales entre UGT y CEOE están prácticamente agotados, según Nicolás Redondo”, *El País*, 20 de mayo de 1981.

Abierta la ronda de reuniones por parte del propio Calvo-Sotelo –un hombre de procedente de la alta empresa y con fuertes vínculos familiares con los *clanes* de las clases dominantes del país– en un primer momento la CEOE se mostraría recelosa e inclusive contraría a entrar en más negociaciones de tipo interconfederal o que, en su caso, pudieran ir más allá de un acuerdo que no fueran de tipo exclusivamente salarial. Más teniendo en cuenta que, por una vez, Comisiones Obreras tenía la firma intención de permanecer hasta el último momento dentro de las mismas, a lo que se sumaba su acercamiento con UGT. A ello se añadía también que todos y cada uno de los restantes participantes en aquella mesa de diálogo tenían claro un principio elemental: la repetición de un nuevo AMI o acuerdo similar, en nada ayudaría a solucionar uno de los principales problemas de la nación. Nos referimos, claro está, al intenso proceso de destrucción de empleo.

Por otro lado, ya hemos visto en páginas anteriores, a través de las actas de la CEC de UGT, la poca confianza que tenía la central socialista frente a la patronal en este proceso de negociación, hasta el punto de llegar seriamente a considerar el retirarse o no de la propia mesa de reuniones. Y nadie mejor que la propia UGT para determinar el *estado de salud* correspondiente tras unos cuantos años de las negociaciones y conspiraciones con la patronal.

Sin que se conozcan del todo las vías y/o medios por los cuales las citadas secretarías de UGT –en especial la dirigida por Corcuera– conseguiría hacerse con tal serie de documentos claves de la CEOE en este tiempo –desde instrucciones de cara a la negociación, a diversos documentos de trabajo o directamente informes confidenciales...–; lo cierto, es que la lectura de los mismos clarifican en extremo la estrategia seguida por la CEOE en este terreno. Puestos a la tarea de negociar, tratarían avanzar en su radical programa de liberalización y flexibilización de la economía española, a través de sus recetas tradicionales. Lo que a su vez –como examinaremos a continuación– tenía como fin último modificar la política económica global del Ejecutivo²⁸¹. Además también ha de destacarse que tales documentos relevan –por pequeña que fuera ésta– una relativa *sensibilidad democrática* acerca de la dramática situación política del país. Algo que, en parte, explica el lenguaje empleado más tamizado en los citados documentos que se han podido localizar.

Poco dada a ofrecer de forma pública sus posiciones políticas y socioeconómicas, la CEOE tras la aprobación del ET y de la firma del AMI, publicaría, y daría a conocer en una rueda de prensa a mediados del año ochenta, un largo documento titulado: “Medidas urgentes para luchar contra el paro: actuaciones básicas”²⁸². Estamos ante el gran “programa económico” de la patronal de España de cara a los siguientes años, y que serviría, en gran medida, de guía para las futuras actuaciones. Allí se contienen todo un conjunto de epígrafes que, prácticamente, repasaban todos y cada uno de los principales aspectos de la situación económica de España, acompañados de las oportunas medidas y recetas de la CEOE.

Filtrado dos semanas antes de su presentación pública al Gobierno y unos días previos a *ABC* y *El País*²⁸³, la CEOE con su presentación pública un 25 de junio de 1980 trataría de presionar al Ejecutivo de cara a modificar su política económica, entonces a cargo de García Añoveros y Abril Martorell²⁸⁴. Dicho esto, el documento lejos de las frecuentes declaraciones radicalizadas y de otros documentos internos manejados por la patronal, venía a ser un canto al

²⁸¹ Consúltase al respecto el extenso reportaje de, Noticia, Julio Fernández, “La negociación de soluciones al paro le sirve al Gobierno para moderar los salarios de cara al Presupuesto de 1982”, *El País*, 5 de abril de 1981.

²⁸² CEOE, *Medidas urgentes para luchar contra el paro: actuaciones básicas*, Madrid, 4 de junio de 1980 [documento localizado a través de, AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Institucional].

²⁸³ Noticia, “La CEOE exige atención preferente a los sectores de energéticos y construcción”, *ABC*, 19 de junio de 1980; Noticia, Carlos Gómez, “La patronal exige cambios sustanciales en la política económica del Gobierno”, *El País*, 24 de junio de 1980.

²⁸⁴ Noticia, “La CEOE invita a los sindicatos a discutir su plan de medidas laborales y sociales”, *El País*, 26 de junio de 1980.

diálogo y a la cooperación. Una hábil jugada por parte de la entonces CEOE de Carlos Ferrer Salat de cara a ganar credibilidad e imagen, a la par que lanzar una nueva ofensiva a la espera de que se desarrollará, entre otras cuestiones, legislativamente el ET.

Prácticamente su *Introducción* podría ser firmada por Gobierno y sindicatos sin mayores contratiempos, tras destacar el drama humano que significaba el paro. Así, por ejemplo, se podía leer como se reclamaba una “urgente política activa de lucha contra el desempleo. Esta activa política exige la colaboración del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores, así como de la sociedad en su conjunto”²⁸⁵. Pese a lo anterior, los siguientes apartados no dejan de ser un mero decálogo neoliberal. Alumnos siempre aventajados de la introducción de los preceptos y axiomas de las tesis neoconservadoras-liberales en España, en su examen del “planteamiento de la situación actual”, lo confiaban todo en un “aumento de la inversión”. “Privada”, por añadidura. Una visión patronal de la “única política posible” que luego sería convenientemente acomodada al proyecto programático de la modernización socialista²⁸⁶.

Bajo la *idea-fuerza* de poner en marcha el “necesario proceso de racionalización de las relaciones laborales”, se asentarían los argumentos *ad hoc* de cara a establecer un nuevo SERL. Lógicamente el asunto pasaba por eliminar “una serie de graves e importantes factores negativos que están haciendo peligrar seriamente las esperanzas puestas por todos en la reforma laboral y, en particular, en el Estatuto de los Trabajadores”. Precisamente, *esperanzas* en cualquier reforma laboral no dejaría de tener, a la menor ocasión, la CEOE en adelante. Igualmente no se dejaría pasar la oportunidad para desgranar su amplio repertorio en materia de política de empleo: mayor flexibilidad en su batalla –de “tintes apologéticos” – contra la rigidez, acompañada de la lucha contra “los costes inciertos que para el empresario sigue teniendo la extensión de la relación laboral”. Más allá de otros frentes abiertos a la vista –desde la formación profesional, pasando por la reforma de la Seguridad Social o la del INEM– también se remarcaría su denuncia frente a la “deficiente aplicación de la legislación laboral hasta ahora aprobada [que] está originando una grave desorientación y una importante dosis de desconfianza empresarial”. Una tabla reivindicativa contra el *mal de los empleadores* en donde no faltaba la crítica ni al “espíritu tutelar” de la Administración, ni otras de las perniciosas manías de los abogados laboristas por seguir empleando el “uso alternativo del Derecho”²⁸⁷.

Su *recetario*, por lo demás, de cara a afianzar la economía de mercado, y por ende un trabajo de mercado moderno, vendría a apoyarse en las habituales recomendaciones: primero, “configurar el empleo como factor flexible y ajustado al carácter dinámico de las empresas”, ello como una forma moderna de introducir la ideología de la flexibilidad; segundo, “[r]egular los tipos de contratación establecidos en el Estatuto de los Trabajadores”; en tercer lugar, la receta más conocida de todas: “[p]romover una política de moderación salarial”; y en cuarto lugar, también se solicitaba “la revisión, modificación y posible integración de los diversos programas actuales [fomento de empleo]”. A lo que se sumaban otras de sus particulares

²⁸⁵ CEOE, *Medidas urgentes para...*, *op.cit.*, p. 7.

²⁸⁶ *Ibidem*, p. 9. Más adelante se llegaba a señalar: «En esta tesitura, el único camino es poner en marcha acciones puntuales concretas en terminados sectores, que al reanimar su demanda irán repercutiéndola después progresivamente sobre el conjunto de la economía y actuando por consiguiente de ‘locomotoras’ de la reactivación económica general y de la inversión también general». *Ibidem*, p. 10. [texto original en *cursiva*].

²⁸⁷ *Ibidem*, pp. 31-32. Al respecto de la última cuestión se decía textualmente: «No cabe ignorar el grave daño que se está causando a las instituciones laborales en su nueva configuración con la defensa que algunos hacen del uso alternativo del Derecho, en función de consideraciones puramente partidistas ni tampoco determinadas prácticas que, en abierta oposición a la ley, están cortocircuitando las posibilidades que la legislación contempla en materia de movilidad geográfica, poniendo en grave riesgo la competitividad de las empresas y el mantenimiento del empleo». *Ibidem*, p. 32.

obsesiones como la necesidad de una ley de huelga²⁸⁸. He ahí el completo *menú* ofrecido por la CEOE.

Pero los empresarios no quisieron dejar pasar la ocasión sin indicar lo mucho que la nación les debía por su “aportación en el terreno de lo laboral mediante importantes sacrificios asumidos en el Acuerdo Marco [AMI]”. No sólo, pues su capacidad de sacrificio no había tocado techo: “El empresario español está plenamente dispuesto a asumir su parte de responsabilidad en un proceso de reactivación económica, de inversión y de generación de empleo”. Para lo cual llama a la creación de un “clima psicológico apropiado a la inversión”²⁸⁹.

En paralelo al desarrollo de las negociaciones de cara al futuro ANE, desde la CEOE se trabajaría en la actualización del anterior programa ante el nuevo contexto socioeconómico así como político. Días antes de su presentación pública del *renovado* programa de la patronal, un miércoles 12 de mayo de 1982, la Secretaria de Acción Reivindicativa se haría con una copia completa del *documento de trabajo confidencial* titulado “Una nueva política de empleo”²⁹⁰. Dividido en dos grandes bloques –*Bases para una política de empleo y Propuesta de medidas*– en el mismo figuraban muy pocas novedades en términos prácticos.

“No resulta exagerado afirmar que la economía española ha llegado a una situación de emergencia”, se afirmaba en su *introducción*²⁹¹. Tras el mar de cifras correspondiente, y hablar de la “notable incapacidad [del mercado de trabajo] no ya para absorber los aumentos vegetativos de la población sino también –lo que es más grave– para mantener la población ocupada”, resultaba que los culpables no dejaban de ser los mismos. No se trataba de la política económica adoptada cuya orientación ni siquiera se cuestionaba, sino que los principales responsables eran la “explosión de los costes laborales” así como la “falta de disciplina presupuestaria por parte del Sector Público”. Y ¡cómo no! la “falta de flexibilidad en el empleo”. Había llegado la hora, según la patronal, de un “cambio global”. Convencida en extremo de la viabilidad de su planteamiento, mantenía que de seguir tales en “al menos dos años” se producirían “aumentos significativos en los niveles actuales de competitividad interior y exterior”. Más aún. Existía un “amplio margen para la esperanza y el sincero compromiso”²⁹².

En el terreno de las propuestas relativas al mercado de trabajo, propondría realizar una “adaptación sin traumas” a lo relativo a la extensión e implantación de una mayor flexibilidad en todo el proceso productivo. La persistente rigidez del mercado laboral aparecía como el enemigo a batir: “Sin embargo, en los últimos siete años se ha mantenido la engañosa política de querer defender a ultranza el puesto de trabajo”, se afirmaría. La conclusión era evidente: “se ha provocado un embolsamiento artificial del paro y se ha agravado innecesariamente la situación de las empresas hasta límites irreversibles para muchas de ellas”. A esto se sumaba la falta de desarrollo reglamentario del Estatuto de los Trabajadores. Ello con un mensaje final:

²⁸⁸ Ibídem, pp. 32-33.

²⁸⁹ Ibídem, pp. 34-35.

²⁹⁰ AHFFLC, CEOE, “Una nueva política de empleo”, mayo, 1981, sig. 0022-003. El anuncio de tal texto se había adelantado previamente en más de una ocasión: Noticia, “La CEOE propondrá dos bloques de medidas diferenciadas para solucionar el desempleo”, *El País*, 29 de marzo de 1981; Noticia, La CEOE estudió ayer su plan macroeconómico”, *El País*, 7 de mayo de 1981.

²⁹¹ Una expresión que llamaría poderosamente la atención al editorialista del medio informativo de *Cinco Días*, quien llegaría a calificar tal planteo de «moderado». Editorial, “¿Situación de emergencia?”, *Cinco Días*, 14 de mayo de 1981.

²⁹² Véase aquí también: CEOE, *La economía española y los presupuestos para 1982*, Madrid, CEOE, 1981.

«El empresario tiene que disponer, por principio, de autoridad y autonomía de gestión en la empresa de forma que pueda adecuar con agilidad la utilización en cantidad y calidad del factor trabajo en función de las circunstancias cambiantes de la economía»²⁹³.

El citado documento no levantaría grandes expectativas a la hora de su presentación. Quizás lo más destacado sería la filtración a la prensa de las críticas internas durante su elaboración, en base a lo *pobre y contradictorio* de sus contenidos. En concreto, se cuestionaría por parte de no pocos pesos pesados de la patronal que la CEOE con aquel documento, no hubiera hecho una defensa cerrada de una de sus reivindicaciones históricas: el despido libre. Tampoco sentaría bien a parte de la cúpula de la patronal, que el documento fuera “indebidamente” filtrado. Lo único cierto es que, en aquella ocasión, la CEOE prefirió rebajar el tono de sus propuestas y como destacaría su Presidente: “No son medidas espectaculares, pero son propuestas de acciones concretas que yo creo que son mucho más efectivas que el exponer grandes líneas de política económica sin entrar en detalles”²⁹⁴. Los inciertos tiempos políticos de transición aconsejaba cierta prudencia, al menos, de puertas para afuera.

Por lo demás, junto con la evidente desgana con la que afrontarían la primera parte de la negociación del futuro ANE, en poco o nada ayudaría a mejorar su tradicional mala imagen todo un conjunto de declaraciones prepotentes y chulescas. Por ejemplo, las efectuadas por el Vicepresidente de la CEOE, José Antonio Segurado, un miércoles 25 de marzo en Zaragoza: “Los culpables absolutos de la actual situación económica son los trabajadores y las centrales sindicales, que a partir de 1976 les politizan y les obligan a no trabajar”, declararía el citado Segurado en un rebrote compulsivo del viejo paternalismo franquista. Entusiasmado y ante un público entregado, según pudo conocer *El País*, señalaría –tal y como recoge la periodista Rosa María Artal– como “las únicas víctimas de la crisis son los empresarios, y se mostró partidario de un Gobierno autoritario”. Todavía habría más y de mejor calidad: “El vicepresidente de la CEOE habló, asimismo de restablecer la autoridad total del empresario en las empresas, y dijo que esto esperaban lograrlo a través del desarrollo del Estatuto de los Trabajadores”. Asimismo Segurado se mostraría a favor de la contratación libre y otras medidas más propias del mundo utópico y feliz del empresariado español²⁹⁵. Por más que al día siguiente rectificará sus declaraciones, por activa y por pasiva, y se mostrara llenó de arrepentimiento declarándose como un demócrata de toda la vida, quedaban evidenciadas las intenciones no declaradas de la CEOE frente a la posible negociación que se abría²⁹⁶. Por si faltaban dudas, las declaraciones de otros altos dirigentes de la patronal antes de finalizar el mes de marzo, mostrando su *escepticismo* acerca de la posibilidad de un acuerdo social, terminarían por confirmar los malos augurios iniciales, tanto con respecto a la posible negociación como en relación a la vida política del país²⁹⁷.

²⁹³ AHFFLC, CEOE, “Una nueva política de empleo”, mayo, 1981, sig. 0022-00, s/p. La publicación oficial del documento se puede localizar en: CEOE, *Una nueva política de empleo: I Bases para una política de empleo; II. Propuesta de medidas*, Madrid, CEOE, 1981.

²⁹⁴ Noticia, “Escasas novedades en la «nueva política de empleo» de la CEOE”, *El País*, 12 de mayo de 1981; Noticia, “Ferrer: «No proponemos medidas espectaculares, pero si efectivas, para salir de la crisis»”, *El País*, 13 de mayo de 1981.

²⁹⁵ Noticia, Rosa María Artal, “Los culpables de la crisis son los obreros, afirma Segurado”, *El País*, 26 de marzo de 1981.

²⁹⁶ Noticia, R. M. Artal, “Los trabajadores españoles están llenos de sensatez, afirma Segurado”, *El País*, 27 de marzo de 1981.

²⁹⁷ El propio José María Cuevas –Secretario General de la CEOE– tras reconocer como las medidas contenidas en el programa económico de Calvo-Sotelo, tendían a favorecer a la parte empresarial, señalaría: «lo que hace falta es que estas medidas se traduzcan en disposiciones publicadas en el BOE y se cumplan. Hay ciertas expectativas de que se van a tomar con urgencia y energía algunas medidas. Pero también tengo serias dudas de que esto suponga que se vaya a reconducir el gasto público hacia la inversión y que se tomen medidas fiscales que incentiven el ahorro». Un escepticismo que extendía a los

Pese a su manifiesta falta de interés, en un primer momento, por el desarrollo de las negociaciones del ANE, y más allá de las *rupturas* y *bloqueos* en tal proceso, no renunciarían a obtener, al menos, pequeñas conquistas y pasos a su favor en el reordenamiento de las políticas de rentas así como en lo referido al SERL. En otro documento de trabajo de la patronal que llegaría también a manos de la Secretaria de Acción Reivindicativa de la UGT, se planteaba un conjunto de observaciones en relación al documento entregado por parte del Gobierno “sobre el marco de relaciones laborales”. Frente a la oposición parcial que había manifestado la UGT, no veía inconveniente alguno, por ejemplo, en el desarrollo legislativo del artículo 17.3 del Estatuto de los Trabajadores. Por el contrario observaba “mayores dificultades” al respecto en relación a la “potenciación de las contrataciones a tiempo completo y duración indefinida”. Pero sobre todo se manifestaba totalmente contraria a la sola posibilidad de que aquellas empresas que hubieran realizados despidos improcedentes sin la consiguiente readmisión, se las pudiera excluir de las ventajas jurídicas y económicas destinadas a la contratación temporal. Para la CEOE, si esto había ocurrido, en parte, se debía a la “fatal de flexibilidad de nuestras normas”. No muchas más críticas habría al mismo, más allá de solicitar mayor valentía política en relación a posibles “conciertos entre la Administración Laboral (INEM) y las Empresas y Organizaciones empresariales”, la “regulación más flexible de los expediente de crisis”, o en desarrollar, sin ambigüedades el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores o directamente los contratos a tiempo parcial, en donde denunciaría el intento de “instrumentar un régimen de prohibiciones y controles ajenos de la propia Administración Laboral contribuiría a la pérdida o restricción de la virtualidad generadora de empleo que encierra” de tal figura²⁹⁸. He aquí el *verdadero rostro* de la gran patronal española.

Cuando las negociaciones del ANE más estancadas estaban, desde la CEOE se decidiría presentar un documento al Ejecutivo con sus propuestas, con el fin de dejar sentadas sus posiciones de mínimos. El citado documento llevaba fecha del 14 de mayo. Es decir, coincidiría con la presentación de *Una nueva política de empleo*. En esa especie de memorándum de la situación política junto con una serie de propuestas, se continuaría con la parcial línea de moderación. Y cuando hablamos de moderación nos referimos tanto a las *formas* como a los *contenidos* teniendo muy presente el pasado cercano de la patronal. De esta forma, se hablaba en el mismo de cómo un “sistema político estable se haya [*sic*] obligado a ofrecer esperanzas de empleos a todos los ciudadanos”. O como una “economía que no es capaz de absorber las transformaciones propias del tiempo en que vivimos, mal puede asegurar o crear el empleo suficiente para ofrecer así digno acomodo a toda la población de una comunidad”. Lejos, por tanto, de las declaraciones altisonantes y fuera de tono, un posible cambio en la correlación de fuerzas a nivel sindical y el hecho posible de que el Gobierno fuera adelante con o sin el apoyo de la patronal, aconsejarían esta prudencia política temporal.

No faltaría incluso ni la llamada a la concertación, en tanto la misma “puede contribuir la participación y colaboración de las fuerzas sociales a la adopción de nuevas conductas, que, ineludiblemente, implicarían cambios tendentes y propiciadores de un nuevo horizonte

primeros contactos con Gobierno y sindicatos. Noticia, Fermín Goñi, “Escepticismo empresarial acerca de las reuniones sobre el paro”, *El País*, 27 de marzo de 1981.

²⁹⁸ AHFFLC, CEOE, “Observaciones al documento «sobre el marco de relaciones laborales»”, 1981?, sig. 002212-003. Otro de los documentos –sin fecha también– que llegaría a obrar en manos de la Secretaria de Acción Reivindicativa de la UGT por parte de la patronal llevaría por título: “I. Orientaciones sobre los aspectos generales que deben tener en cuenta al abordar el acuerdo”. En estas instrucciones *internas* y *reservas* más allá de insistir en la necesidad de desarrollar las medidas de contratación temporal de fomento de empleo, presentaban los argumentos centrales sobre los cuales asentar su propuesta de moderación salarial a la que se la calificaba de ‘solidaria’: «La reducción del poder adquisitivo de los salarios persigue un gran objetivo: la reducción del coste de trabajo, incentivando empleo. Con esto se establecería una solidaridad efectiva entre trabajadores empleados y desempleados». Asimismo se proponía ligar la «reducción del poder adquisitivo a la creación de empleo». E inclusive se llegaría a pedir la «[c]ongelación desde 1982 por un periodo de dos años de los niveles relativos actuales de las cotizaciones totales». AHFFLC, CEOE, “I. Orientaciones sobre los aspectos generales que deben tener en cuenta al abordar el acuerdo”, 1981?, sig. 0022-003.

generador de empleos”. Inclusive se mostraba dispuesta a un “gran esfuerzo de solidaridad” para modificar la LBE, con el objetivo de “reducir al mínimo el infortunio que la situación de desempleo representa para aquél que la padece”. En cualquier caso, las soluciones para tales objetivos pasaban por “desarrollar la nuevas modalidades contractuales que se deducen del Estatuto de los Trabajadores” así como “abrir el abanico de opciones posibles en materia de contratación laboral”. “Afrontar la grave coyuntura actual, estableciendo un marco flexible de carácter legal y convencional”, aparecía como el “instrumento” clave “para afrontar la situación”. A lo que se le acompañaría, por último, de un llamamiento a la *paz laboral*: “Así, no sólo es importante sentar el criterio de una conveniente pacificación de las relaciones sociales, sino que, al mismo tiempo, coadyuva a ello como instrumento adecuado el establecimiento de unas reglas de conflictos y arbitrajes”²⁹⁹. Con el aquel mismo documento la CEOE dejaba asentada sus posiciones y principios frente a la última fase de la negociación, cuyo final no vislumbraban por parte de ninguno de los agentes sociales implicados en el mismo.

Así estaba el panorama a mediados de mayo de 1981. La parálisis había dado lugar al pesimismo. Un día antes de la celebración de la ya comentada rueda de prensa de UGT, se conocería como por parte del Ejecutivo no se descartaba que en caso de no ser posible un acuerdo social se fuera a un nuevo AI. Acuciado el Gobierno, ahora presidido por Calvo-Sotelo, por la situación de inestabilidad política reinante, pero sobre todo por la necesidad de romper con dicha situación de parálisis, anunciaría el lunes 18 de mayo que el mismo se podría sumar a cualquier tipo de acuerdo-marco entre sindicatos y patronal. Se trataba, en suma, de superar la “sensación de impotencia y frustración a los españoles”. Ni siquiera se daban cifras. Valía, entonces, cualquier tipo de acuerdo para *salir del paso*³⁰⁰. Ahora bien, todo parecía sugerir que la dinámica instalada no iba a romperse ni ninguno de los implicados iba a ceder en medio de no pocas reuniones que no dejaban de sucederse entre la CEOE y UGT, y Economía, y de las que poco o nada se sabía más³⁰¹.

El nuevo *shock* que provocaría en medios políticos y sindicales el asalto por un comando al Banco Central de Barcelona, situado en la céntrica Plaza de Cataluña el 23 de mayo de 1981, modificaría, una vez más, las estrategias de las dos grandes confederaciones sindicales del país³⁰². Después de uno de los sucesos menos aclarados de la transición en relación a la autoría del propio asalto, quedaba evidenciada la fragilidad del sistema democrático en medio de continuadas desarticulaciones de movimientos golpistas así como del feroz terrorismo etarra o sucesos tan significativos como el “Caso Almería” vinculado este último a la “guerra sucia” del Estado.

Lo realmente trascendente de este mismo acontecimiento, tras lo sucedido el 23 de febrero, es que el mismo va a actuar como revulsivo de cara a la rápida resolución de las negociaciones. Todo ello tras superarse la parálisis inicial en donde no se descartaría inclusive dar por concluidas las negociaciones de forma definitiva³⁰³. Así el ANE es producto, en gran medida, de dos *shock traumáticos*, prácticamente, consecutivos.

No habían pasado ni 48 horas de los sucesos en la Plaza de Cataluña cuando la CEC de UGT calificaba la situación de “incredibilidad del Gobierno”, añadiendo como tal acontecimiento “vuelve a poner de actualidad el tema de un Gobierno de amplia mayoría y extenso apoyo social”. Nunca como entonces la UGT se volcaría de tal forma a favor de un

²⁹⁹ AHFFLC, CEOE, [sin título], Madrid, 14 de mayo de 1981, sig. 002212-003.

³⁰⁰ Noticia, Carlos Gómez, “El Gobierno se puede sumar en breve a la firma de un segundo acuerdo-marco entre sindicatos y patronal”, *El País*, 19 de mayo de 1981: Noticia, “La capacidad de gasto público limita las negociaciones sobre empleo, según García Díez”, *El País*, 21 de mayo de 1981.

³⁰¹ Noticia, “CCOO y UGT unificarán criterios sobre el empleo”, *El País*, 23 de mayo de 1981.

³⁰² Véase aquí, Editorial, “Al servicio de la libertad”, *Unión*, nº 1, (1981), p. 2.

³⁰³ Noticia, “Pesimismo en las negociaciones sobre el empleo”, *El País*, 26 de mayo de 1981. Allí mismos se indicaba como un marco futurible de actuación era renunciar a «cualquier tipo de consenso».

posible Gobierno de concentración. Hasta tal punto de acordarse una reunión con CCOO y elaborar un “comunicado conjunto que fuese realmente impactante para la opinión pública” y que reflejara “la necesidad de un Gobierno de coalición para sacar al país de este «impasse»”. Pero a su vez aquel suceso va a tener otra consecuencia no menor en ningún caso: el rechazo a ir un pacto social sin la presencia de CCOO, y solicitar de inmediato la apertura –tras más de tres meses de reuniones bilaterales y/o secretas– de reuniones oficiales, y por tanto abandonar el secretismo dominante³⁰⁴. Un *secretismo*, en cualquier caso, que se mantendría hasta el mismo 2 de junio.

Una decisión que venía precedida de una fructífera reunión entre ambas fuerzas sindicales el viernes 22 de mayo, y en donde se acordaría ir a la elaboración de un documento crítico con las posiciones de la CEOE y del Gobierno³⁰⁵. Tan fructífero que el miércoles 27 de mayo UGT y CCOO llegarían a un principio de acuerdo de cara al ANE, pero sobre todo a no seguir participando en las negociaciones sin la presencia del sindicato de mayoría comunista. Por otro lado, también se acordaría por ambas centrales asumir una pérdida de poder adquisitivo de dos puntos por debajo del IPC a cambio de toda una serie de contrapartidas, entre las que figuraba el compromiso de creación de entre 300.000 a 350.000 puestos de trabajo³⁰⁶. He aquí el primer gran punto de inflexión de las negociaciones después de tres meses.

Maniatado el Gobierno de cara a la elaboración de los PGE pero sobre todo preocupado por la situación ofrecida, decidiría entonces dar un ultimátum. Y esta vez parecía cuando menos más firme: el viernes 5 de junio fecha del próximo Consejo de Ministros debería tener en la mesa un acuerdo –o varios acuerdos llegado el caso– en relación las negociaciones del Acuerdo Nacional de Empleo. Así pues, las reuniones bilaterales o tripartitas llegaban a su fin³⁰⁷. Más tras el también anuncio de la *cumbre* prevista entre todos los implicados para el miércoles 3 de junio.

Un anuncio que sería apoyado fervientemente por la CEOE, quien acariciaría la posibilidad de dar por finiquitado aquella larguísima ronda de negociaciones, advirtiendo de que no llegar a un acuerdo daría por rotas “definitivamente las negociaciones”. La estrategia de presión cada vez más radicalizada se ponía en marcha por parte de la patronal quien criticaría, además, como el “acuerdo sobre empleo se está acercando a un pacto de protección al desempleo”, y denunciaría el documento del Ejecutivo como “poco presentable”³⁰⁸.

Pese a lo dramático de la situación se cerraría el mes de mayo de 1981 sin avances concretos posibles, que hicieran pensar en la posibilidad de firmar un acuerdo social de envergadura, o cuando menos a un pacto a tres bandas con ciertos mínimos. De esta forma, la semana del 1 al 7 de junio va a convertirse en clave para el futuro contenido del ANE en medio de persistentes rumores, dudas y sospechas de que el ANE, al final, podría quedarse en nada.

En una reunión de la CEC de UGT a primera hora de la mañana del martes 2 de junio, lo que abundaban eran las dudas técnicas acerca de la última oferta del Gobierno³⁰⁹. De esta forma, y en un intento de ganar tiempo se volvía a convocar a su Comité Confederal para el fin

³⁰⁴ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 25.5.81”, sig. 0022561-002.

³⁰⁵ Noticia, “CCOO y UGT unificarán criterios sobre el empleo”, *El País*, 23 de mayo de 1981.

³⁰⁶ Noticia, “Acuerdo entre CCOO y UGT en las negociaciones sobre empleo”, *El País*, 28 de mayo de 1981.

³⁰⁷ Noticia, “Los presupuestos siguen frenados por los pactos sobre desempleo”, *El País*, 29 de mayo de 1981; Noticia, “El próximo Consejo de Ministros, fecha tope para el acuerdo sobre el empleo”, *El País*, 31 de mayo de 1981.

³⁰⁸ Noticia, “La patronal, dispuesta a romper si el próximo día 5 no se firma el acuerdo sobre empleo”, *El País*, 2 de junio de 1981.

³⁰⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 2.6.81”, sig. 0022561-002.

de semana del 6 y del 7 de junio para tomar las últimas decisiones oportunas. Eso sí, se optaría por la vía ordinaria por más que el contexto fuera de emergencia y/o extraordinario.

Sin saber exactamente si durante el 3 y 4 de junio se reuniría la CEC de UGT, en tanto se carecen, una vez más, de *actas* para aquellos importantes días; lo cierto, es que los técnicos – con Armando Caro y Miguel Ordoñez a la cabeza– estarían, en la práctica, en permanente sesión de cara a evaluar la conveniencia o no de los avances de los múltiples encuentros que tendrían lugar en esas mismas fechas. De esta forma, la convocatoria de la reunión del miércoles 3 de junio aparecía a todas luces como clave para llegar o no a un acuerdo.

Por lo que se filtraría la noche anterior, uno de los principales escollos parecía en vías de solucionarse: la creación y/o mantenimiento del actual nivel de empleo durante la vigencia del ANE, hablándose ya de la necesidad de crearse anualmente 350.000 empleos. También se conocería que dentro del acuerdo se incluiría un apartado para el futuro “desarrollo del Estatuto de los Trabajadores (normativa que fomente el empleo)” así como medidas en torno a la cobertura de desempleo y sobre moderación salarial. Exactamente, estas dos últimas cuestiones aparecían como “dos de los temas más difíciles para la consecución del acuerdo”³¹⁰.

Por fin, en la tarde del 3 de junio tendría lugar la primera reunión oficial de cara al futuro ANE. La hora a las 17.30 en la sede del Ministerio de Economía y Comercio. Lo que entonces nadie sabía es que aquella cita se convertiría en una de las más largas de toda la historia de la concertación social en España. Sin comunicado oficial de por medio, sería a través de las filtraciones de los propios interesados, por donde se conocerían más que los acuerdos o desacuerdos, las *sensaciones colectivas* previas. Mientras que Comisiones Obreras se mostraba recelosa ante “las prisas que parecen haberles entrado a Gobierno y patronal”, UGT señalaba como las “negociaciones no iban a ser largas”, aunque hablaba de una semana para llegar a “acuerdos definitivos”. Por parte del Gobierno se remarcaría su decisión –*no negociable* para más señas– de llegar al próximo Consejo de Ministros con un documento avanzado en torno a la posibilidad o no de acuerdo así como sus diversos puntos de acuerdos/desacuerdos. Asimismo ya resultaba evidente para todos los implicados que el desarrollo legislativo del ET relacionado con la contratación temporal se constituiría en el principal escollo³¹¹. Lo último que supo de aquel primer día de negociaciones, tras una interrupción a las 20.30h, es que el acuerdo, tal y como se estaba desarrollando, parecía complicado de obtener.

A poco menos de veinticuatro horas para que expirara el ultimátum del Ejecutivo y de la CEOE, el jueves 4, se volverían a reunir a tres bandas todos los implicados. Según informaba Rodolfo Serrano desde las páginas de *El País*, por lo abordado hasta entonces existía la intención y/o voluntad de ir hacia un acuerdo dividido en varios documentos, lo que daría a su vez a varios acuerdos. En el primero, se incluirían medidas de política económica global, en donde la CEOE –por lo que podía entre leer– o bien había sido excluida, o bien, se había auto-excluido; el segundo acuerdo trataría de temas de empleo exclusivamente. Lo que parecía claro era que los *temores* de la CEOE de ir hacia un acuerdo con contenidos sociales parecía cada vez más una realidad. Así Arturo Gil, vocero de la patronal, declararía la posible “pobreza de un acuerdo que se circunscribe a dar mayor cobertura al desempleo”. De esta forma, la patronal ponía en práctica su tradicional estrategia de endurecer radicalmente sus posiciones, de cara a llevar a un callejón sin salida la posibilidad de firmar o no un posible acuerdo, para a su vez ir imponiendo sus posiciones. Al mismo tiempo, el otro gran punto de diferencia se centraba en la política salarial: del 9% al 11% para CCOO y UGT; del 8% al 10% para la CEOE; y del 8% al 11% para el Ejecutivo.

A lo anterior había que sumar como el “desarrollo de los decretos que reflejan el Estatuto de los Trabajadores entrañan problemas sobre los que, hasta el momento, no ha habido

³¹⁰ Noticia, “El Gobierno se comprometerá a mantener el actual nivel de empleo”, *El País*, 3 de junio de 1981.

³¹¹ Noticia, “Primera reunión conjunta Gobierno-sindicatos-patronal sobre el tema de empleo”, *El País*, 4 de junio de 1981.

un acercamiento entre las distintas posturas”. A partir de ahí, en un claro movimiento político-estratégico desde el Gobierno el mismo jueves 4 de junio filtraba a la Agencia EFE, que con o sin acuerdo, “piensa presentar esta misma mañana [5 de junio] ante el Consejo de Ministros los decretos de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación”. He aquí otra evidencia de cuales eran, desde el principio, las principales prioridades del Ejecutivo dirigido por Calvo-Sotelo a la hora de trazar las líneas maestras del ANE, junto con su política de moderación salarial. Eso sí, quedaba la duda si aquello no era más que un movimiento de presión o directamente una amenaza real.

Avanzada la madrugada del ya viernes 5 de junio, tras un descanso de la reunión del propio del propio jueves, cada una de las partes dejaba marcada sus propias las “líneas rojas”, justamente, antes del cierre de la edición de los periódicos nacionales. Mientras que para los representantes de Comisiones Obreras, la impresión era que “la patronal trata de transformar estas conversaciones en un nuevo AMI”; Fabián Márquez se daba de plazo aquella misma noche para llegar a un “acuerdo o *kaputt*”, añadiendo como el Gobierno ya tenía en su poder el propio *informe confidencial* de la CEOE que antes hemos recogido, e indicando que “le cayó bien, por lo que sería lógico que se tuvieran en cuenta nuestros criterios”. No faltarían, por último, en aquella crónica el clásico alegato al *pesimismo* o como “las conversaciones no pueden prolongarse”³¹².

¿Qué pasó aquella madrugada del 4 al 5 de junio en la sede del Ministerio de Economía en una reunión que terminaría a las 7.30h de la mañana? Por lo que se conoció durante las siguientes semanas y meses, allí se emplearían por parte del Gobierno, de las centrales sindicales y por parte de la propia patronal, todos los argumentos pensables e imaginables así como todas las artimañas inimaginables. También se conocerían, de forma parcial, algunos de los grandes momentos de tensión que se vivirían. “A las 5 de la madrugada del jueves al viernes, el ministro de Economía y Comercio, Juan Antonio García Díez, trataba de relajar los músculos y despejar la cabeza”, se podía leer en el segundo número de *Unión*. Más aún pues también se contaría como “[u]no de los mayores momentos de tensión se iban a producir a las 7.30 horas de la maña del viernes después de casi tres horas de conversaciones particulares entre el ministro de Economía con el presidente del Gobierno y del secretario General de la CEOE, con su presidente Carlos Ferrer”. En ese preciso momento se decidiría aplazar la larga reunión hasta que la CEOE reuniera su directiva. No obstante, proseguía aquel relato, “a esa misma hora también, el ministro de Trabajo, Sancho Rof, anunciaba que los decretos sobre fomento del empleo tendrían que quedar fuera del texto del acuerdo”³¹³.

Pero realmente, ¿qué paso? Ha sido gracias una vez más a Mariano Guindal a través de donde se ha podido conocer con detalle los intensos y dramáticos momentos que se sucederían aquella larga noche. Por más que las *cifras* y *días* en los que centra su relato vuelvan a ser inexactas –habla de la madrugada del 7 de junio, fecha totalmente imposible– viene a aportar un relato no sólo más vivo sino ante todo más cercano a lo que pudo suceder y alejado de la frialdad de los reportes periodísticos.

De entrada, narra como la primera impresión que recibieron los representantes de UGT –Zufiaur– y de CCOO –Sartorius– es que el “gobierno estaba dispuesto a concederles todo lo que pudieran con tal de que firmases esa noche [4 de junio]. La razón es que se cumplían los cien primeros días de gobierno y necesitaban presentar ante la opinión pública sus logros”. El primer pequeño-gran escollo vendría con la aceptación por parte de García Díez de la banda salarial que los sindicatos habían anunciado –entre el 10% al 12%–. “¡Ya está bien! Coño, os habéis puesto de acuerdo para montarnos el paripé”, gritaría Cuevas. Aquello se saldaría, previa petición de la patronal, con la salida de los dos ministros presentes –García Díez y Sancho Rof– de la sala, para discutir entre patronal y sindicatos el tema de la banca salarial.

³¹² Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno puede llegar a acuerdos distintos con la patronal y las centrales sindicales”, *El País*, 5 de junio de 1981.

³¹³ “A pesar de todo fue posible”, *Unión*, nº 2, (1981), pp. 1-3.

«A los dos de la mañana, y ante la incapacidad de encontrar un punto de acuerdo común [banda salarial en función del número de horas trabajadas] declararon rotas las negociaciones. Arturo Gil, vicepresidente de la CEOE, harto de aquella situación, cogió su artera y se dirigió al vestíbulo para irse a su casa. A los cinco minutos regreso absolutamente sorprendido.

-No puedo salir. Han cerrado las puertas del ministerio y nadie parece tener las llaves. Me han preguntado que si hemos llegado a un acuerdo. Creo que nos tienen prisioneros hasta que firmemos».

A partir de ahí vendría una reacción histérica por parte de más de un presente –lo que las crónicas describieron como momentos de tensión o “cierto nerviosismo en la madrugada del viernes”³¹⁴– que se saldarían con el aporreo de la puerta y “gritos en medio de un gran escándalo”. A lo que García Díez, contestó: “Que no se marche nadie. Esto lo tenemos que arreglar esta misma noche. Me voy a reunir con cada parte por separado”. Lo más duro estaba por llegar. Tras las reuniones individuales con CCOO y UGT, José María Cuevas entraría a vérselas con el seños Ministro de Economía una vez más. Tras negarse este último a aceptar cualquier tipo de acuerdo que no estuviera refrendado por la Junta Directiva de la CEOE, García Díez llamaría al Presidente del Gobierno. “García Díez estaba histérico, con los ojos enrojecidos. -Oye, que dicen que no firman –informó por teléfono a Calvo-Sotelo–. Que José María dice que no firma. Bueno, bueno. Ponte José María y habla con Leopoldo”. No cedió Cuevas bajo los mismos argumentos. Bajo las órdenes de Calvo-Sotelo, el Ministro de Economía llamaría a Carlos Ferrer. Misma escena. Cuevas decía que había que reunir a la directiva de la patronal, y que “aunque se reúna, yo defenderé que no se firme. Estamos aquí encerrados”, le diría vía por teléfono al Presidente de la CEOE. Y desde ese momento, entre las 4.30 a las 7.30 el Vicepresidente Económico del Gobierno sería incapaz de volver a contar con, Ferrer Salat quien se puso al habla con cada uno de los Vicepresidentes. Atacado de los nervios García Díez, llegaría inclusive a solicitar al gabinete telegráfico que intervinieran su teléfono [Ferrer Salat]”.

No hubo sorpresas ni rectificación por parte de la patronal. La CEOE no firmaba nada sin que su directiva lo aprobara en su caso.

«Y García Díez se derrumbó en el sofá, como si le hubiese caído una bomba. ‘Una cosa impresionante –nos contó Cuevas–. Aquel hombre se echó a llorar. Increíble, llorando como un niño’. Había fracasado y la tensión de una noche sin dormir le hizo perder los nervios»³¹⁵.

Cerca de las 8.00 de la mañana salieron del Ministerio de Economía en lo que, sin duda, fue una de las noches más accidentadas de toda la historia de la concertación sindical. Prácticamente, sin tiempo de descansar, la Directiva de la CEOE se reuniría en su sede madrileña. Una reunión sobre la que apenas se informaría públicamente en torno a sus decisiones. Ni siquiera en *ABC* se pudo encontrar la habitual referencia³¹⁶. Tan sólo en *El País* Rodolfo Serrano reseñaría como el desbloqueo de la patronal se daría, “según distintas informaciones por alguna advertencia hecha en este sentido por los representantes del Gobierno hacia la CEOE”, cuando se ratificaría que la banda salarial del Ejecutivo rondaba entre el 9% al 11%. Más aún apuntaba como tras las quejas de la CEOE por no haberse hablado de política económica, terminarían encontraron “eco en los representantes del Gobierno”. De ahí la insistencia de estos últimos, en que una “una vez finalizadas las conversaciones, en que los acuerdos incidirían positivamente en la política económica del Gobierno”. Para concluir: “Palabras que indudablemente tenían un destinatario que no era fundamentalmente el que en aquellos momentos escuchaba”³¹⁷.

³¹⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “CEOE y sindicatos firmarán un protocolo al Acuerdo social de empleo sobre empleo para dar eficacia a la negociación colectiva”, *El País*, 7 de junio de 1981.

³¹⁵ GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, op.cit., pp. 180-186, respectivamente.

³¹⁶ Noticia, Luis Peiro, “Moderación salarial y protección a los desempleados, claves del acuerdo”, *ABC*, 6 de junio de 1981.

³¹⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “CEOE y sindicatos firmarán un protocolo al Acuerdo social de empleo sobre empleo para dar eficacia a la negociación colectiva”, *El País*, 7 de junio de 1981.

Y una vez más para superar ese permanente *secretismo* las referencias de Guindal se nos aparecen como fundamentales: “La patronal no había conseguido ninguna contrapartida de aquellas reuniones, aunque tenían su propio acuerdo confidencial con el gobierno ucedista, como la subida de la tarifa de la luz a las eléctricas”. Otro de esos grandes *pactos no públicos* que tan sólo se conocerían después de un largo tiempo. En cualquier caso, la “junta directiva de la CEOE fue borrascosa”. Pese a todo, y dado el contexto político-económico, “no podían dejar al presidente literalmente «con el culo al aire»”, afirmaría el propio Ferrer Salat. Las condiciones seguirían las siguientes: “que el gobierno asumiera el compromiso de reducir el gasto público, controlar el déficit y disminuir la inflación”. Peticiones que transmitiría personalmente Cuevas a García Díez:

«-Yo no puedo hacer eso. El gobierno no puede comprometerse a cumplir un cuadro macroeconómico que es imposible –se quejó el ministro.

-Bueno –le concedió Cuevas–, pues no os comprometáis formalmente. Que sea el presidente del Gobierno quien a través de unas declaraciones diga que va a perseguir esos objetivos. Alguna salida nos tenéis que dar para que nuestras bases aprueben el acuerdo.

-Está bien, así se hará –accedió García Díez»³¹⁸.

Dicho y hecho. Calvo-Sotelo se prodigaría en los siguientes días en toda una pléyade de declaraciones, a cada cual más variopinta. El lunes 8 de junio el Presidente del Gobierno en ese gran escenario que constituía la Asociación para el Progreso de la Dirección vendería optimismo y liberalismo, mostrándose “inusualmente brillante”. Tan brillante que soltaría una frase siempre recordada: “el acto de inversión tiene algo erótico”³¹⁹. Más pronto que tarde se sucederían las correspondientes declaraciones desde Economía o Hacienda³²⁰.

En una reunión extraordinaria de la CEC de UGT convocada el mismo día 5 de junio a las 13,30h y que terminaría dos horas más tarde, se abordarían los criterios para ir a la reunión convocada por la tarde a tres bandas de cara a si se firmaba o no se firmaba el ANE. “El tema que suscita las mayores discrepancias radica en la interpretación que pretende dar el Gobierno, influido por la patronal, a los decretos por desarrollar el Estatuto de los Trabajadores, sobre nuevas formas de contratación”. Problema que ocuparía toda la reunión. Se confirmaba así, en parte, las declaraciones de unas horas antes del propio Fabián Márquez. A partir de ahí se reconocía lo siguiente:

«La manera en que se ha presentado la última redacción presupone la institucionalización de la flexibilidad de plantillas, y una profunda alteración en el mercado de trabajo, que conduciría a gran parte de los nuevos contratos se harían bajo la forma de contratos parciales, temporales o de formación».

Llegada aquella situación, el acuerdo de la CEC sería el siguiente: “Manifestar al Gobierno que al UGT no asumirá un acuerdo en el que estén incluidos los decretos bajo su actual redacción”. Para que no hubiera ningún tipo de duda se afirmaba:

«Deberá quedar claro que esta decisión de nuestra C.E. es imperativa y absolutamente condicionante de la firma, y que la única manera de que pudiera llegar el acuerdo la UGT está en que queden excluidos los decretos de que los mismos deberán ser objeto de conversaciones paralelas, en las que la UGT planteará para cada uno de ellos cuáles son sus puntos de no retorno».

Una posición firme y prácticamente unilateral que de haberse llevado a la práctica hubiera frustrado las negociaciones del ANE. En la práctica, no sería así como tiempo tendremos de explicar. En realidad, desconocemos las razones últimas del posterior *giro* de la CEC de UGT en la reunión celebrada aquella misma tarde, al no haber actas –lo que no debe

³¹⁸ GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, op.cit., pp. 188-189.

³¹⁹ Noticia, “Calvo Sotelo vendió optimismo y liberta para salir de la crisis ante varios centenarios de empresarios”, *El País*, 9 de junio de 1981.

³²⁰ Véase, por ejemplo, “El desempleo no se reducirá sustancialmente en 1982, según García Añoberos”, *El País*, 11 de junio de 1981.

confundirse con la no existencia de reuniones– hasta el 22 de junio. A saber, casi dos semanas después de acordarse y firmarse el ANE.

Por fin, llegaría el acuerdo. A las 22.30 del viernes 5 de junio de 1981 finalizaba la última reunión a tres bandas para el ANE que había comenzado siete horas antes. Se termina aquella larga ronda de negociaciones. Llegaba la hora de dar a conocer los acuerdos públicos así como las posturas de cada parte. Una muy moderada alegría por parte de los sindicatos y una frialdad por parte de la patronal, serían las notas dominantes en los primeros compases.

El País recogería en su edición del 6 de junio, en lo básico, las declaraciones de Arturo Gil por parte de la CEOE. Dicho representante se limitaría a señalar al respecto de la política de empleo propuesta de la patronal como “era más amplia” añadiendo como “aunque se han recogido aspectos contemplados en nuestro documento sobre nueva política de empleo, hay otros que no han sido ni tratados”. Poco añadirían los diferentes responsables de prensa del Ministro de Trabajo y del Ministro de Economía, más allá de felicitarse por el acuerdo alcanzado y algún que otro gesto de autoalabanza. Por parte de los sindicatos en una rueda de prensa calificada como de precipitada, nada mencionarían acerca de los futuros decretos de contratación temporal. Nicolás Sartorius declararía como lo más importante era “que se hubiera logrado el acuerdo y que no hayamos llevado al país un nuevo motivo de frustración”; mientras que Zufiaur señalaba como tal acuerdo consolidaba la política de negociación de la propia UGT y añadiendo como “es muy importante que hayamos conseguido comprometer al Gobierno en fechas concretas”³²¹.

El silencio acerca de los decretos de fomento del empleo sería casi total. Tan sólo el *ABC* se haría una pequeña mención: “Y una aplicación más favorable [para la CEOE] del Estatuto de los Trabajadores. En quince días el Gobierno publicará los decretos que permitirán la contratación de trabajadores por un tiempo determinado, sin que ello suponga aumentar las plantillas”. El periodista laboral de *ABC*, Luis Peiro, encargado de aquella crónica, probablemente mejor informado –por parte de la patronal– que el propio Rodolfo Serrano dejaría caer la siguiente descripción de cómo habían transcurrido las negociaciones –por lo que se conocía y quiso que se conociera– al respecto de los tantas veces citados decretos, advirtiendo, al mismo tiempo, de la más que segura existencia de algún que otro “pacto” que no se reflejaría en el texto final:

«Y pese a los recelos sindicales porque vayan a aumentar los empleados a tiempo determinado y a disminuir los contratos indefinidos. En este punto, como en otros, los negociadores forzaron al máximo su habilidad. No ha sido posible un acuerdo de todos en un texto para los decretos sobre contratación temporal y la solución ha sido sacar su contenido del documento final. ‘La responsabilidad de cualquier decreto es siempre del Gobierno’ ha comentado sindicalistas y empresarios, aunque lógicamente media un tipo de pacto que quizás por no ser favorable a unos que otros no tiene el consenso de todos

Una idea de los esfuerzos que se han hecho por aproximar posturas, el dato de que en la madrugada del jueves el ministro Sancho Rof hizo exactamente esa propuesta –sacar los decretos de la negociación– con la negativa tajante de los sindicatos. Horas después se aceptó en aras del entendimiento»³²².

Más de un año se tardaría en conocer realmente que había sucedido así como se entenderían las prisas de los representantes sindicales por salir del paso en aquella delicada situación.

³²¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los salarios crecerán en 1982 entre el 9% y el 11%”, *El País*, 6 de junio de 1981.

³²² Noticia, Luis Peiro, “Moderación salarial, protección a los desempleados, claves del acuerdo”, *ABC*, 6 de junio de 1981.

Durante el fin del semana del 6 al 7 de junio se reunirían las cúpulas de las direcciones de CCOO y de UGT para decidir su postura final frente al acuerdo³²³. En paralelo, mientras tanto se redactarían las versiones que darían lugar al texto final del ANE, filtrándose los primeros borradores a la prensa³²⁴. Un acuerdo que, en términos generales, sería bienvenido por parte de los principales medios de comunicación, empezando por *El País*, definido en aquellos días por José Luis Arangurén como el “intelectual colectivo” de la nación³²⁵. En un editorial al respecto, resaltaría como el mismo significaba, antes que nada, “un mayor grado de madurez de cada uno de los interlocutores implicados”. Añadiendo a continuación como el ANE “sobrepasa con mucho los contenidos de un pacto social clásico”. Valorando el mismo en tres aspectos: el psicológico de cara a dar una respuesta positiva y de unidad frente a la debilidad política realmente existente; el sindical de cara a la unidad de acción lograda por primera vez en muchos años entre CCOO y UGT; y en tercer lugar, quedaba eliminada la identificación de la CEOE como los *malos de la película*³²⁶.

Lo que no dejaba lugar a dudas, era que los sindicatos habían pactado una *nueva moderación salarial* estimada en dos puntos de pérdida de poder adquisitivo, en un momento delicado a nivel institucional. Aunque, por otro lado, se habían obtenido no pocas reivindicaciones de carácter social, empezando por la revisión de la LBE y su reglamento publicado no hacía más de diez días en el BOE³²⁷. En realidad, sobre aquellos dos puntos sustentarían su defensa CCOO y UGT ante sus respectivos órganos de dirección.

Si bien, en el caso de UGT, el asunto se *salvaría* sin mayores reticencias y discusiones en la reunión de su CC³²⁸; no sería así en el caso de CCOO, en donde pronto llegarían las críticas al ANE. Mediante filtraciones interesadas en la mayor parte de los casos –en una constante que venía de tiempo a atrás y que no dejaría de reproducirse durante los siguientes años– desde *El País* aquel mismo fin de semana se haría eco de la oposición de determinados sectores de CCOO al ANE.

A poco menos de dos semanas de la apertura del II Congreso Confederal de CCOO, la misma afrontaría tal negociación desde la debilidad política, organizativa y estratégica ya apuntada tras la firma del AMI. Una situación agravada todavía más tras conocerse oficialmente los resultados de las Elecciones Sindicales de 1980³²⁹. En este clima, en la I Conferencia Nacional de las CCOO de Cataluña para debatir la posición política del sindicato así como la elección de delegados, se elaboraría una resolución ampliamente apoyada –228 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones– en donde se indicaba: “[L]a CONC se reserva el juicio sobre los acuerdos, pero considera claramente inaceptables, hoy por hoy, dichos acuerdos”³³⁰. No

³²³ Noticia, “UGT refrenda el proyecto de acuerdo sobre empleo”, *El País*, 9 de junio de 1981. Una noticia que recogía unas declaraciones de José Luis Corcuera en donde se afirmaría como el ANE había sido posible gracias a las «posiciones mínimas de UGT».

³²⁴ Por ejemplo: Noticia, “Acuerdo nacional sobre empleo”, *El País*, 7 de junio de 1981. Nada se decía en aquel borrador de la posterior ‘fórmula de compromiso’ que aparecería en la redacción final.

³²⁵ ARANGUREN, José Luis, “*El País* como empresa e «intelectual colectivo»”, *El País*, 7 de junio de 1981.

³²⁶ Editorial, “Acuerdo Nacional sobre el Empleo”, *El País*, 7 de junio de 1981.

³²⁷ Real Decreto 920/1981, de 24 de abril, *por el que se aprueba el Reglamento de Prestaciones por Desempleo* [B.O.E. 23 de mayo de 1981].

³²⁸ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría General, “Informe de Gestión que presenta la CEC”, Madrid, 6 y 7 de junio de 1981, sig. 002603-008; y, AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Organización, “Acta. Comité Confederal celebrado en Madrid los días 6 y 7 de junio de 1981”, sig. 002603-011.

³²⁹ Véase lo apuntado en la *nota 196*.

³³⁰ Noticia, Enric Canals, “CCOO de Cataluña califica de inaceptable el pacto sobre el paro”, *El País*, 7 de junio de 1981. Tal sería la situación dada que el propio Marcelino Camacho marcharía a Barcelona de forma urgente de cara a tratar de dar la vuelta a la resolución citada. De nada serviría al

terminarían ahí los sobresaltos en los siguientes días para las Comisiones Obreras³³¹. La lucha por redefinir la estrategia sindical pero sobre todo la configuración de una dirección se saldaría con la presentación de una candidatura alternativa a la oficial, pero sobre todo con la exclusión de los *prosoviéticos* y *críticos* del nuevo secretario de CCOO³³².

Como todo acuerdo y pacto social en la historia de la concertación social con *final feliz*, tocaba la representación del mismo con la correspondiente firma así como fotografía de la “paz social”. Una fotografía a la que siempre se la ha otorgado un alto valor político y simbólico por motivos obvios. En el caso del ANE, tras tantos meses de conspiraciones y tensiones, la misma tendría lugar el martes 9 de junio. Pese al grave momento político, el mismo tendría una relativa incidencia mediática. De la misma forma, de dicho acto protocolario se recordaría para la posteridad una de esas grandes frases celebres que los gobernantes se suelen reservar para tales ocasiones: “Un diálogo primaveral como éste debe repetirse todo los años”, afirmaría el propio Calvo-Sotelo, quien debido a su corto mandato no tendría muchas ocasiones para tales *faenas* de lucimiento³³³. No terminarían ahí las autoalabanzas: “Han sabido ustedes ejercer un duro y difícil oficio, pero que es esencial para la democracia: negociar [...]. Han dado ustedes a los españoles el ejemplo de saber llegar a este acuerdo”³³⁴.

También aquel 9 de junio se conocería –aunque no en toda su amplitud– el primero de los acuerdos secretos del ANE, que, en aquella ocasión, se prefirió denominar como “compromiso bilateral”. Un *compromiso* que, en primer lugar, sería filtrado por Nicolás Sartorius en una rueda de prensa, y donde indicaría como el mismo consistía en subvención de 800 millones anuales durante los tres siguientes años a los sindicatos, en concepto de patrimonio sindical. Todo ello con el compromiso que durante todo ese tiempo cesarán tales reivindicaciones, al respecto. Un *arreglo* que sería confirmado por el propio Ministro de Economía horas más tarde. En los siguientes meses se conocerían más detalles sobre el mismo así como sus *otras implicaciones* acerca de uno de los “acuerdos secretos” centrales del ANE, y donde a la CEOE se le ningunearía la información hasta su interesada filtración a la prensa³³⁵.

Por sí mismo, la firma del ANE no conllevaría ningún efecto automático tanto a nivel socio-laboral como político. En realidad, y como se ha insistido, su diseño respondía a otras claves a medio plazo pero sobre todo de cara a generar la imagen de cierta estabilidad político-institucional. Una estabilidad, tanto o más necesaria, en una coyuntura en donde no se visualizaba una salida de la crisis en un breve corto plazo de tiempo, y se conocía a los pocos

encontrarse con el rechazo, una vez más, de la CONC en boca de su Secretario General –Lope Bulla–. Noticia, Alfons Quintá, “CCOO de Cataluña rechaza el acuerdo nacional sobre empleo”, *El País*, 9 de junio de 1981.

³³¹ Por ejemplo, el miércoles 10 de junio se conocía como el dirigente Nicolás Sartorius abandonaría el Secretariado Confederal de CCOO tras el II Congreso Confederal. Noticia, “Nicolás Sartorius abandona el secretariado de CCOO”, *El País*, 10 de junio de 1981. Véase también: Noticia, Victorino Ruiz de Azua, “El acuerdo sobre empleo no garantiza nuevos puestos de trabajo”, *El País*, 17 de junio de 1981.

³³² Noticia, Alfons Quintá y Rodolfo Serrano, “Candidatura alternativa a la oficial en el II Congreso de Comisiones Obreras”, *El País*, 20 de junio de 1981; Noticia, Rodolfo Serrano, “«Prosoviéticos» y «críticos», excluidos del nuevo secretario de CCOO”, *El País*, 30 de junio de 1981.

³³³ Noticia, “Un diálogo para cada primavera”, *El País*, 10 de junio de 1981. Asimismo véase, SARTORIUS, Nicolás, “El Acuerdo Nacional de Empleo y las próximas primaveras”, *El País*, 3 de julio de 1981.

³³⁴ Noticia, “El ejemplo de llegar a acuerdos”, *ABC*, 10 de junio de 1981.

³³⁵ Noticia, “Los sindicatos recibirán del Estado 2.400 millones en tres años”, *ABC*, 10 de junio de 1981. Una noticia en donde se recogía la propia explicación ofrecida por Economía: «La explicación oficial señala que al tratarse de un acuerdo bilateral entre Gobierno y sindicatos se consideró más oportuno no plasmarlo en el texto del Acuerdo Nacional sobre Empleo».

días de la firma del ANE como se continuaban destruyendo 1.300 empleos diarios en España³³⁶. Y ello dentro de una renacida conflictividad laboral en donde no dejaban de ser frecuentes las retenciones y secuestros de empresarios, entre otras acciones de lucha por parte de los trabajadores afectados por cierres y Expedientes de Regulación³³⁷. Asimismo, en medio de grandes acontecimientos políticos –desde la entrada en la OTAN, pasando por la LOAPA o el estadillo del caso del aceite de colza, que todavía se atribuía a una extraña neumonía– se conocería, muy parcialmente, la desarticulación de una nueva intentona golpista³³⁸.

Ultrajada y herida tras la filtración del día nueve de junio, la CEOE saldría a la ofensiva contra el Ejecutivo. No faltarían las declaraciones. Mejor dicho: las amenazas durante todo el mes de junio. Sin margen de posible rectificación, y siempre a través de medias-verdades y obvias falsedades, se llegaría, inclusive, en un primer instante, a reclamar retomar una “negociación abierta y limpia entre el Gobierno, las centrales sindicales y nosotros a partir de ahora”³³⁹. Con una Comisiones Obreras dedicada en *cuero y alma* a resolver las divisiones de su II Congreso Confederal, tan sólo desde UGT se saldría con un tibio comunicado, en donde se resaltaba como el acuerdo alcanzado había sido con posterioridad al ANE. Otra medio-verdad³⁴⁰. Por otro lado, en segundo lugar, vendrían las amenazas de llevar a acciones “de derecho y presión pública para lograrlo”. Y en un inusual gesto de transparencia informativa – más teniendo en cuenta el secretismo que había rodeado las negociaciones del Acuerdo Nacional de Empleo– José María Cuevas en rueda de prensa sacaría una serie de documentos negociados con UGT, para explicar como el asunto del patrimonio sindical se había sacado fuera de la mesa. No sólo, pues, aseguraría que “esto no se ha tratado en Consejo de Ministros”. Declaraciones, por cierto, rápidamente desmentidas por fuentes bien informadas de medios sindicales³⁴¹.

Pocos muy pocos apoyos iban a encontrar los empresarios fuera de su estricto ámbito³⁴². Desde *El País* se llegaría a afirmar como la campaña de la patronal “no puede sino contribuir a la confusión y crispación de nuestro panorama político, en unos momentos en que la demagogia de los golpistas hace leña de cualquier manera”. Para a continuación añadir: “La desmesurada campaña de la CEOE está alimentando el desnutrido almacén de argumentos de la ultraderecha para apuntalar tan absurda teoría”³⁴³. Y pese a ser recibos por el propio Calvo-Sotelo³⁴⁴, ya nada

³³⁶ Noticia, “1.300 parados diarios más durante el primer trimestre de 1981”, *El País*, 17 de junio de 1981.

³³⁷ Por ejemplo, “Vila Reyes, retenido por un grupo de trabajadores que reclamaban sus salarios”, *El País*, 14 de junio de 1981.

³³⁸ Noticia, “La policía desarticula una operación golpista en la víspera del santo del Rey”, *El País*, 24 de junio de 1981.

³³⁹ Las anteriores palabras corresponden a unas declaraciones del propio Ferrer Salat en Tenerife el 10 de junio: Noticia, “La CEOE protesta contra el «pacto secreto» Gobierno-sindicatos al margen del acuerdo sobre empleo”, *El País*, 11 de junio de 1981.

³⁴⁰ Noticia, “La comisión ejecutiva de UGT”, *El País*, 12 de junio de 1981.

³⁴¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “La confederación empresarial exigirá responsabilidades a los ministros de Economía y Trabajo”.

³⁴² Entre las excepciones, de primera fila, la del Secretario de Estado para el Empleo y las Relaciones Laborales: Noticia, “El secretario de Estado para el empleo, contrario a devolver el patrimonio sindical”, *El País*, 24 de junio de 1981.

³⁴³ Editorial, “Dinero para los sindicatos”, *El País*, 19 de junio de 1981. No tardaría en llegar la respuesta al editorial, a través de un encendido artículo de opinión de, CUEVAS, José M^a, “El acuerdo sobre empleo y las subvenciones a las centrales sindicales”, *El País*, 24 de junio de 1981. Por cierto, aquel mismo día, quien llegara a ser el Secretario General de la OTAN, escribiría también en el citado medio: SOLANA, Javier, “La patronal no tiene quien la quiera”, *El País*, 24 de junio de 1981.

³⁴⁴ Una vez más sobre el desarrollo de aquella reunión véase el relato de, GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, op.cit., pp. 191-192. Allí cuenta como sería el propio Sartorius quien daría una copia del

sería igual en esas no siempre relaciones entre la CEOE y la Patronal. Todo ello, en un momento tampoco fácil para la patronal, en tanto, se estaba produciendo una huida masiva de empresas a una nueva asociación empresarial³⁴⁵.

Llegados aquí, por tanto, y más allá de nombrar a García Díez “ministro de la consolidación sindical”, no cesarían, desde entonces, los ataques contra lo que consideraban el *sector socialdemócrata* del Ejecutivo, verdadera obsesión de la patronal y en particular de Ferrer Salat³⁴⁶. Un presidente de la patronal que no dejaría de reivindicar, en adelante, una gran coalición de la derecha para frenar a los socialistas, quien además lanzaría todo un mensaje: “Nosotros respetaremos siempre un Gobierno socialista que salga de las urnas, que respete la libre empresa y la economía de mercado. Eso lo respetaremos, pero respetar no es apoyar”³⁴⁷.

En suma, aquella considerada *traición* de los 800 millones, se saldaría con dos relevantes consecuencias: primero, se bloquearía –cuando no directamente se sabotearía– el desarrollo del propio ANE, fuera a través de declaraciones que daban a entender un futurible *absentismo empresarial*; y segundo, se llegaría por este camino al fin de las relaciones entre la CEOE y UCD como avanzábamos unas líneas antes³⁴⁸.

Junto con las numerosas críticas internas en el caso de Comisiones Obreras por haber negociado tales contenidos en el ANE, se vendría a sumar las procedentes de sindicatos minoritarios y nacionalistas durante aquellas semanas³⁴⁹. De hecho, escasas serían las posiciones favorables desde el mundo sindical a la firma del Acuerdo Nacional de Empleo. En cualquier caso, y una vez más, UGT destacaría por su inusitado empeño en defender el ANE durante buena 1981 y parte de 1982. O de forma concreta, hasta la convocatoria de las elecciones generales de octubre. Pese a lo dicho, –junto con algún que otro artículo de opinión aparecido en la prensa³⁵⁰– lo cierto es que tan poco le sería sencillo a la central socialista sacar adelante el apoyo al ANE en el Comité Confederal Ordinario celebrado los días 6 y 7 de junio, como se pudo leer en *Unión* en donde se narraba como la discusión duraría más de 10 horas, finalizando a las 3 de la madrugada del sábado, por más que se obtuviera al final una cerrada votación³⁵¹.

Y ello que todavía no había llegado la parte más complicada de gestionar el ANE para los sindicatos firmantes. Nos referimos al desarrollo legislativo de la contratación temporal. En sí mismo el documento firmado –como ahora veremos– a través de sus dos puntos concretos –“IV. Medidas de Fomento de Empleo” y “VII.2. Desarrollo del Estatuto de los Trabajadores”– no contenía ninguna medida concreta o especificación oportuna. Un *acuerdo* con el que se salvaría la fase final de negociación el viernes 5 de junio, por las razones ya apuntadas: los sindicatos no podían, tanto a nivel interno como a nivel público, firmar un documento que, al mismo tiempo, que apoyaba una moderación salarial también favorecería la extensión de la tan

acuerdo al propio Cuevas y como en medio de la reunión con Calvo-Sotelo y García Díez sacaría la misma ante las negativa de los interesados.

³⁴⁵ Noticia, “Cien mil empresas abandonan CEPYME-CEOE”, *El País*, 4 de julio de 1981.

³⁴⁶ Noticia, “CEOE bautiza a García Díez como ministro de la consolidación sindical”, *El País*, 30 de junio de 1981.

³⁴⁷ Noticia, “Los socialdemócratas, factor de perturbación en UCD”, *El País*, 17 de junio de 1981.

³⁴⁸ Véase al respecto, Noticia, “«No hay expectativas de creación masiva de puestos de trabajo», según Cuevas”, *El País*, 1 de julio de 1981.

³⁴⁹ Noticia, “Rechazo de LAB y Euskadiko Ezkerra del acuerdo tripartito sobre empleo”, *El País*, 12 de junio de 1981; EXTEBERRIA, Alfonso, “Un pacto social, y no un acuerdo sobre el empleo”, *El País*, 17 de junio de 1981; o, BONDIA ROMAN, José, “Consideraciones en torno al ANE”, *El País*, 15 de julio de 1981.

³⁵⁰ ZUFIAUR, José M^a, “Acuerdo sobre empleo, crisis y estrategia sindical”, *El País*, 20 de junio de 1981.

³⁵¹ “El Comité Confederal dijo sí”, *Unión*, n° 2, (1981), p. 1-5. Consúltese también ese mismo número, “Atajar el paro, contener la frustración”, *Unión*, n° 2, (1981), p. 3.

temida contratación temporal. O mejor dicho, refrendar una expansión de la flexibilidad laboral sin aparentes límites. Por cierto, ¿de qué tipo de *límites* estebábamos hablando? Pronto se conocerían. Lo cierto es que los sindicatos se guardarían todavía un *as en la manga* en aquellas circunstancias al respecto, como explicaremos más adelante.

Así pues, en verdad, lo único que venía a señalar el punto VII.2 del ANE es que existía un acuerdo –sin concretar ni detallar– a partir del cual desde el Ejecutivo se podían desarrollar el siempre anunciado *pack legislativo* de cara a fomentar la contratación temporal, y cuyos borradores había discutido con los agentes sociales. De esta forma, en breve, los temores sindicales se desatarían sobre un posible incumplimiento de lo acordado no públicamente ni por escrito por parte del Ejecutivo.

Lo anterior se intuye de otro informe de la Secretaría de Acción Reivindicativa a los tres días de la firma del ANE. En el informe titulado, “Observaciones que se formulan a los proyectos de R.D. sobre contratación laboral”, se da cumplida cuenta de las intenciones gubernamentales al respecto³⁵². Allí se constatarían varias cuestiones preocupantes desde la óptica sindical: por un lado, se decía, “[n]o se señala una duración mínima para los contratos temporales”, mientras que, por otro, también se constataba como “[n]o se establece un porcentaje máximo, en relación con la plantilla, de contratos temporales”. Otro tanto sucedía con los borradores del programa de fomento del empleo. De entrada, se denunciaba como el “Proyecto no incluye a los parados ni el derecho a prestaciones y con responsabilidades familiares”. Advirtiendo como de esta forma se “incumple la cláusula IV.1 del ANE”. También se advertía como no se incentivaba la contratación indefinida y como se mantenía la “financiación de los programas con cargo a los presupuestos para el desempleo”. En relación a los contratos en prácticas y para formación se denunciaría la paupérrima retribución que les asignaba, así como quedaban “excluidos los trabajadores entre 18 y 20 años”. Y en lo que se refería a la contratación a tiempo parcial mostraba la única satisfacción al reconocer como el “Gobierno ha recogido la mayor parte de las observaciones formuladas por UGT”.

Cerradas de cara para a afuera posibles divergencias en el seno de la UGT –aunque no pocas diferencias se puedan constatar en las propias actas de la CEC de UGT al respecto– sobre el texto base del ANE –se desconoce en realidad si a los miembros del Comité Confederal se les informaría de los otros *acuerdos secretos*– se trataría, en una primera fase, de defender lo realizado así como en salir a denunciar la campaña de la CEOE sobre el tema del patrimonio sindical. De esta forma, en una reunión que tendría lugar el 22 de junio, si diseñaría desde la Ejecutiva ugetista una “campaña de explicación y de difusión” en donde se trataría de implicar a los “cuadros de la Organización” al respecto del ANE. Y con respecto al futuro *pack legislativo* se aprobaba como de cara a la “reunión bilateral prevista al respecto y de la primera reunión conjunta”, los borradores presentados planteaban “serios problemas, ya que la primera versión no respectaba los mínimos acordados con el Gobierno”. Los temores parecían confirmarse ante una posible “traición” por parte del Gobierno. También en aquella prolífica reunión se constataría un nuevo problema: la necesidad de diferenciarse de Comisiones Obreras en adelante, tras la salida de su II Congreso Confederal³⁵³.

³⁵² AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Reivindicativa, “Observaciones que se formulan a los proyectos de R.D. sobre contratación laboral”, Madrid, 12 de junio de 1981 [redactado por a.c. seudónimo de Armando Caro], sig. 002212-001. También véanse los argumentos esgrimidos por Nicolás Redondo para justificar el apoyo del ANE por parte de UGT: Noticia, “UGT refrenda el proyecto de acuerdo sobre empleo”, *El País*, 9 de junio de 1981.

³⁵³ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 22.06.1981”, sig. 002561-002. También ha de señalarse como dentro del sindicato socialista surgirían una serie de divergencias internas en torno al ANE. En el *punto de varios* de esa misma *acta* se reconocerían los problemas causados por una serie de declaraciones del Secretario General de UGT de Álava al respecto. Asimismo véase la visión que se tendría del transcurso del citado Congreso Confederal de CCOO en, ZUFIAUR, José M^a, “Faltó una verdadera autocrítica”, *Unión*, n^o 3, (1981), p. 3.

A poco menos de cuatro días de que el Consejo de Ministros aprobará las medidas legislativas sobre contratación temporal, se produciría una nueva reunión de la CEC de UGT. En concreto, el lunes 29 de junio. Una reunión en donde se daba por “perdida” –a su manera– la *batalla* por la contratación temporal, teniendo, a buen seguro, en su poder los borradores definitivos de los reales decretos. Textualmente se decía: “se apunta la conveniencia de manifestar nuestro desacuerdo cuando salgan aunque sin estridencias”. Toda una declaración de los problemas de *sacar a la luz*, dada la correlación de fuerzas y el contexto político preciso, los acuerdos pactados. No obstante, más radicaría ahí la mayor de las preocupaciones ugetistas. Pues estas pasaban por diferenciarse de CCOO en “su intento de articular una campaña con UGT” al respecto del ANE. Tales serían los temores de que redactarían toda una serie de instrucciones para evitarlo³⁵⁴. Asimismo es de reseñar como que en las reuniones de la Ejecutiva del 14 de julio y del 30 de julio de 1981, cuando ya se conocían los decretos publicados en el BOE, no se mencionarían absolutamente nada sobre la ampliación de la contratación temporal que supondrían los mismos, limitándose en ambos casos los principales puntos tratados tanto a la Comisión de Seguimiento, la campaña de difusión así como a la cuestión de la devolución del Patrimonio Sindical³⁵⁵. En ello también, qué duda cabe, mucho ayudaría que aquellos reales decretos pasaran bastante desapercibidos en la prensa, y los principales representantes mostrarán una tibia oposición a los mismos³⁵⁶.

Un *silencio sin estridencias* que también se mantendría en *Unión*. Ni un sola línea se dedicaría en los números correspondientes a aquel verano –entre julio a septiembre– a la contratación temporal³⁵⁷. Pero si es de resaltar como en el órgano oficial de expresión de la Ejecutiva Confederal UGT se dejaría bien claro, desde el principio, las dudas acerca de los posibles incumplimientos del Ejecutivo en aspectos claves del ANE. Por ejemplo, con respecto al compromiso de crear 350.000 puestos de trabajo. Así en un *editorial* se llegaría se afirmaría: “Y la respuesta a la misma no puede ser otra que ésta: no existe una garantía absoluta sobre el cumplimiento por parte del Gobierno de este compromiso”. Todo un signo de las inquietudes que sobre el mismo *acuerdo* circulaban entre afiliados y trabajadores, y que como hemos visto provocaría inusuales críticas internas dentro del propio sindicato. En cualquier caso, se avisaba de los posibles costos electorales para la propia UCD, a la vista de que las próximas elecciones generales tendrían lugar en 1983. Así pues, bajo el argumento de que se había firmado tal acuerdo por el “principio de solidaridad con los desempleados”, tocaba presionar y exigir su cumplimiento³⁵⁸. Por lo demás, escasas también serían las referencias al respecto en *Gaceta Sindical*.

El ANE tuvo un *parto* delicado, una *infancia* nada sencilla y una *precoz* madurez, salpicada de desacuerdos hasta la ruptura del mismo por parte de la CEOE en un primer lugar.

³⁵⁴ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 29.06.1981”, sig. 002561-002. También en las citadas actas se harían contar los problemas causados por una carta de la Federación Estatal de Construcción criticando la postura del CC de UGT en relación al apoyo del ANE.

³⁵⁵ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 14.07.1981”, sig. 002561-002; AHHFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 30.07.1981”, sig. 002561-002

³⁵⁶ Por ejemplo, en *El País* solamente se haría mención el asunto en una pequeña nota informativa, que, a su vez, recogía una encuesta realizada por EFE. En la misma se citará lo siguiente: «Por UGT, Manuel Chaves, secretario de información, afirmó que ponen en peligro la estabilidad en el empleo al ser utilizados, y deben tener control sindical y no extenderse más allá de 1981. Finalmente, Antonio Gutiérrez expresó la oposición de CCOO a los contratos temporales que no fijen un tiempo mínimo o un límite de plantilla sometida a este procedimiento». Noticia, “CCOO y UGT quieren limitar los contratos temporales”, *El País*, 5 de julio de 1981.

³⁵⁷ Tan sólo en el número 5 de septiembre se citarían los decretos publicados el día 29 de agosto sobre jubilación especial a los sesenta y cuatro años o el incremento de la cotización por horas extraordinarias. “El ANE, en marcha”, *Unión*, nº 5, (1981), p. 5.

³⁵⁸ Editorial, “El ANE y su cumplimiento”, *Unión*, nº 3, (1981), p. 2.

Con todo, su importancia histórica es fundamental, tanto en relación al delicado momento político como en lo relacionado con la historia de la concertación social, y, por ende, de la contratación temporal.

Todavía más, la firma de un acuerdo de este tipo va a contar por vez primera con la presencia Comisiones Obreras –recuérdese que en los Acuerdos Económicos de la Moncloa tan sólo firmarían los líderes de los partidos políticos que hubieran obtenido representación parlamentaria–. De la misma forma, ha de resaltarse –también como otro elemento novedoso– como los firmantes sociales lo harían en un plano de igualdad con el propio Gobierno, quien adquiriere un conjunto compromisos por escrito. No es este ningún punto menor cuando se revisa el ABI o el propio AMI. En segundo término, el ANE ante todo es un mensaje de cara a garantizar la estabilidad social e inclusive la *paz laboral*. Si esto último no se va a conseguir como se evidenciará, en breve, ante la negociación colectiva de 1982; el valor dado por la derecha política y por la socialdemocracia a este acuerdo, en un primer momento, será altamente significativo. Ahí, por ejemplo, están las declaraciones del propio Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo: “Un diálogo primaveral como ése debe repetirse todos los años”. O las del propio Felipe González: “El que vaya contra el ANE es un desestabilizador”³⁵⁹. No obstante, ha de observarse también –a modo de tercera novedad– que el ANE significaría, a fin de cuentas, un impulso a la titubeante política liberal del ejecutivo, quien mucho se había salvaguardado de negociar la misma, al negarse por *activa* y por *pasiva* a formar un Gobierno de concentración. Por último, el ANE nos sitúa en el contexto de pre-llegada de los gobiernos socialistas y con él, todo un bagaje acerca de los límites y alcances de este tipo de acuerdos, que pronto darán paso a no pocas frustraciones por casi todas las partes.

Si en los anteriores *acuerdos sociales* y/o *acuerdos inteconfederales* la contratación temporal, o bien, se omite, o bien, queda reducida a algún que otro pequeño párrafo; en cambio, el ANE va a dedicarse –tan sólo en su parte pública y conocida– dos capítulos enteros: “IV. Medidas de Fomento de Empleo” y “VII.2. Desarrollo del Estatuto de los Trabajadores”. Aquí el cambio es también apreciable. Pero antes de entrar en mayores detalles, y desde la perspectiva global aquí planteada, el *acuerdo* firmado el 9 de junio de 1981 contiene una serie de apartados que van a consolidar el último tramo de la política económica de los gobiernos centristas como ya se ha dejado constatado.

Empezando, en esta ocasión, por el final: en torno al Acuerdo Nacional de Empleo, siempre sería recordada su Comisión de Seguimiento establecida en el epígrafe VIII, y que llegaría –no sin ciertas dosis de populismo– a calificarse como de un “gobierno paralelo”³⁶⁰. El ANE, por cierto, evitaría introducir cualquier tipo de apartado en relación a su naturaleza jurídica³⁶¹. Tampoco se publicaría en el BOE³⁶².

Retomando la cuestión de la Comisión de Seguimiento –como uno de los primeros órganos tripartitos realmente creados a tal efecto y con no pocas prerrogativas *ad hoc*– su propio

³⁵⁹ VILLA, Luis Enrique de la, *Panorama de las...*, *op.cit.*, pp. 21 y 23, respectivamente.

³⁶⁰ «Para controlar, vigilar e interpretar el cumplimiento del presente Acuerdo, las partes firmantes han decidido la constitución de una Comisión de Seguimiento y Control del mismo. La comisión de Seguimiento y Control de Acuerdos ser reunirá bajo la presidencia del ministro de Trabajo Sanidad y Seguridad Social o del Ministerio de Economía y Comercio, o de la persona en quien se delegue, y la integrarán tres representantes de la Administración, tres representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y tres representantes de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y tres representantes de la Unión General de Trabajadores. Esta Comisión se reunirá bimensualmente y, a la vista de la información que reciba sobre la ejecución en las medidas contenidas en el presente Acuerdo, realizará las propuesta necesarias para su cumplimiento». Acuerdo Nacional de Empleo, Epígrafe “VIII. Comisión de Seguimiento y control del acuerdo”.

³⁶¹ Véase aquí lo apuntado al respecto en el apartado “12.2.5 El primer y el último acuerdo social de la época socialista: análisis de Acuerdo Económico y Social”.

³⁶² Véase la bibliografía apuntada en el Capítulo 7, *nota 127*.

desarrollo evidenciaría los muy limitados consensos del tal acuerdo social, así como los estrechos cauces de la voluntad de las partes por llegar al mismo. Cada parte, a su manera, no dejaría de instrumentalizar la citada Comisión en aras de sus intereses políticos particulares y en donde no faltarán todo tipo de mezquindades y oportunismos muy lejos –como hemos dicho– del aire un tanto *mistificado* con el que se ha querido revestir a este pacto social.

Pero el principal y más relevante acuerdo del ANE se establece en su primer punto: “I. Compromiso de Empleo”.

«I.1. El gobierno establecerá en virtud de este Acuerdo, una política económica que haga efectivo el compromiso de mantener, al final de 1982, la misma población asalariada ocupada global que la existente en el momento de la firma de este Acuerdo.

Este compromiso supone la estimación de crear del orden de 350.000 nuevos puestos de trabajo al objeto de recuperar la posible caída de empleo en este período».

Considerado como un requisito ineludible por parte de los sindicatos de cara a garantizar su firma, en cierta parte sería el único punto del ANE que se llegaría a cumplir. Eso sí también a su manera. Sin conocerse en toda su plenitud los acuerdos totales del propio ANE, tal contrapartida sería, a la postre, la más presentable para UGT y CCOO, junto con algún que otro detalle social y/o presupuestario que no tendrían traslación práctica. No era poco, en todo caso, teniendo en cuenta el escenario de destrucción de empleo y de depresión económica generalizada.

Así pues, a duras penas se llegaría a cumplir tal parte del ANE. Y, no de forma completa. Como se reconocería en un *informe interno* de la Secretaría de Acción Reivindicativa fechado en el I Trimestre de 1982, el incremento de la población ocupada le iba a corresponder, casi en exclusiva, al sector público: “La mejora en la evolución de la población asalariada, se debe al sector público ya que el sector privado sigue descendiendo”. Pese a lo cual, también se mantendría como no “[n]o resulta imposible su cumplimiento [objeto citado del ANE]”. Con todo, buena parte de las tendencias que se podían apreciar, se debería, según el citado *informe*, más a una “sutil manipulación del paro registrado que en un descenso real del mismo, máxime si el propio INEM reconoce en informes confidenciales [su proceso] [sic] [instrumentalización de] los datos”. Igualmente se reconocería como los contratos temporales realizados a través del RD 1363 y del RD 1364 eran “los que mejores resultados estaban dando”³⁶³.

De esta forma, lo que se conocería en aquellos primeros años como el *absentismo empresarial* seguía siendo un común denominador de la vida económica de la nación. Todo ello, pese a que la CEOE vería, una vez más, respaldada su postura de moderación salarial. Más bien, de pérdida de poder adquisitivo. Cuestión que los sindicatos bien sabían que se produciría al acordarse en el epígrafe “II. Crecimientos salariales en 1982” una banda salarial de entre el 9 a 11 por ciento. Al igual que había sucedido en el AMI de 1980, se reproducirían también una serie de excepciones a la hora de aplicar tal subida en determinados casos –por ejemplo, las empresas en crisis– así como se llegaría a redactar una estricta “II. 3. Cláusula de revisión salarial”. Igualmente ha de tenerse en cuenta el apartado diferenciado el “II.8 Criterios salariales en empresas en reconversión”. Todavía más, pues, por ejemplo en el capítulo “II.7 Salario Mínimo” nada se decía, nada se acordaba, dejando todo el peso de la decisión al arbitrio gubernamental.

La situación de pérdida de poder adquisitivo era tan previsible que pese haberse firmado el ANE, los primeros meses de 1982 estarían marcados –especialmente en el mes de febrero– por un rebrote de la conflictividad. Junto con esta situación reproducida en la negociación de multitud de convenios, las diferentes interpretaciones sobre el ANE conducirían a uno de los más sonados fracasos de UCD: garantizar la paz laboral a través del propio Acuerdo Nacional

³⁶³ AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Reivindicativa, “Informe de situación”, Madrid, mayo 1982?, sig. 002286-004.

de Empleo³⁶⁴. La inflación final de 1981 sería de 14,4 puntos y en 1982 de 14,4 puntos. Es decir, se trató de dos años especialmente duros en términos de pérdida de poder adquisitivo durante la década de los años ochenta.

A su vez en el ANE encontramos un intento parcial de revisión con respecto a los aspectos más duros de la LBE, que con tanto ahínco criticarían las fuerzas sindicales. A ello se le dedicaría el apartado “III. Cobertura de desempleo” en un momento en que ya se conocían los primeros efectos perniciosos de tal normativa³⁶⁵. A partir de ahí se van a ampliar y a flexibilizar –en un sentido positivo y/o más protector– cuestiones tan básicas como las prestaciones no contributivas –artículo 25 de la LBE– la consideración del significado real de una oferta adecuada al empleo –artículo 22 de la LBE– o se revisarán, parcialmente, el Reglamento de la LBE contenido en el RD 920/1981³⁶⁶. No sólo, pues también los sindicatos conseguirán arrancar una importante contrapartida: un fondo especial de protección a los desempleados dotado con 15.000 millones de pesetas, y en donde un 40 por 100 lo aportaba directamente el Gobierno y el 60 por 100 restante a cargo de cuotas empresariales. El mismo sería administrado y gestionado de forma tripartita. Ahora bien, puesto en marcha aquel fondo a través del Real Decreto-Ley 1/1982, de 15 de enero, *por el que se crea el Fondo Especial de Protección al Desempleo*³⁶⁷ se constataría en su primer año de marcha que no iba a ser viable cumplir con su artículo 1: “El Fondo habrá de agotarse íntegramente en dicha fecha debiendo adecuarse el gasto de forma que exista remanente hasta el fin del ejercicio de mil novecientos ochenta y dos”. La imprevisión y la falta de tiempo real para gestionarlo de forma adecuada, llevaría tras varias reuniones del Consejo Rector –de carácter tripartito (artículo 4)– a posponer *sine die* el gasto del remanente restante, a través del Real Decreto-Ley 23/1982, de 23 de diciembre, *por el que se prorroga la aplicación del Fondo Especial de Protección al Desempleo*³⁶⁸.

Igualmente el ANE –un acuerdo ambicioso a nivel programático y con notable desarrollo reglamentario– también incluiría diversas cuestiones: desde la lucha contra el fraude en la percepción del seguro de desempleo (III.6 y III.7)³⁶⁹; pasando por diversas medidas de distribución del empleo (“IV.3 Jubilación pactadas en convenio” en donde se dejaba abierta la

³⁶⁴ Noticia, “La interpretación del Acuerdo Nacional sobre Empleo provoca numerosos conflictos laborales en toda España”, *El País*, 13 de febrero de 1982.

³⁶⁵ Nos remitimos aquí a la *nota 186*.

³⁶⁶ Real Decreto 2345/1981, de 4 de septiembre, *sobre prestaciones complementarias de desempleo* [B.O.E. 21 de octubre de 1981]. Y también, Orden de 13 de enero de 1982, *por el que se determina el concepto de responsabilidades familiares a efectos de las prestaciones complementarias por desempleo* [B.O.E. 30 de enero de 1982].

³⁶⁷ Real Decreto-Ley 1/1982, de 15 de enero, *por el que se crea el Fondo Especial de Protección al Desempleo* [B.O.E. 3 de febrero de 1982].

³⁶⁸ Real Decreto-Ley 23/1982, de 23 de diciembre, *por el que se prorroga la aplicación del Fondo Especial de Protección al Desempleo* [B.O.E. 31 de diciembre de 1982]. Finalmente el mismo se derogaría años y medio después a través del Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, *por el que se acomodan al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, modificar por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, las normas sobre anticipación de la edad de jubilación como medida de fomento del empleo* [B.O.E. 20 de julio de 1985].

³⁶⁹ Al respecto debe destacarse el desarrollo reglamentario de la figura del ‘controladores de empleo’ como colaborador de la Inspección de Trabajo de cara a seguir de cerca el *temido* fraude del seguro del desempleo, aunque sus funciones también abarcaban otros aspectos como *controlar* las subvenciones dadas a los empresarios. Véase, Real Decreto 1638/1981, de 19 de junio, *sobre control de empleo* [B.O.E. 4 de agosto de 1981]. Una medida que venía a concretar y a desarrollar tanto la Ley 51/1980 como el RD 920/1981, y basada, a su vez, en la Disposición Final Cuarta del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, *sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo* [B.O.E. 18 de noviembre de 1978].

posibilidad de poner en marcha los posteriormente conocidos como “contratos de relevo”³⁷⁰; “IV. Cotización por horas extraordinarias”³⁷¹ o medidas contra el “IV.5 Pluriempleo”) hasta otros aspectos de carácter de reforzamiento del hecho sindical –(VI. Consolidación Sindical)–³⁷². También como todo “buen” acuerdo que se pueda considerar como tal, el mismo contenía el *típico* epígrafe en donde la patronal arañaba algún que otro punto en relación a la cotización social. En este caso, sería un *pico* considerable a través del “IV.6 Aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social en 1982”, en donde se indicaba como el “Gobierno asume el compromiso de incrementar su aportación al Presupuesto de la Seguridad Social correspondiente a 1982 para cifrarla en 350.000 millones de pesetas”. Otro de los *eternos* asuntos que, asimismo, se incluiría sería el de la revisar y combatir el fraude en las cuentas de la Seguridad Social, además de establecerse una Comisión Tripartita para el “control de la gestión de la Seguridad Social” (V. Seguridad Social). Todo ello con muy escasos resultados finales.

El empeño flexibilizador de los ejecutivos centristas tendrá aquí su penúltimo impulso. De esta forma, la contratación temporal se estimularía a través de sus dos vías: la casual y la de fomento del empleo. Más allá de que sucederá en la primavera de 1982 al calor de las enconadas negociaciones en relación al futuro RD 1445/1982 –de las que hablaremos largo y tendido– en el ANE en su punto “IV. Medidas de Fomento de Empleo” se apuesta firmemente por bonificar casi al 100 por 100 este tipo de contratación:

«Por ello la contratación de trabajadores desempleados con responsabilidades familiares y la de quienes hayan agotado la prestación básica de empleo, estará bonificada con una cantidad equivalente al 90 por 100 de la cuota de la Seguridad Social en los contratos que tengan una duración mínima de un año».

Para tales labores el Gobierno destinaría “14.000 millones de pesetas, fondo que será sufragado en las proporciones establecidas por la Ley Básica de Empleo para la cobertura de Prestaciones por Gobierno y Empresa”. A los anteriores colectivos y como ya comenzaba a ser regla, el ANE va también a atender a la precaria situación del desempleo juvenil. A pesar de encuadrarse en el contrato común las fórmulas de prácticas y formación, se daría aquí un

³⁷⁰ Exactamente se indica en ese punto lo siguiente: «Las partes firmantes del Acuerdo han examinado los posibles efectos sobre el empleo del establecimiento de un sistema que permita la jubilación con el 100 por 100 de los derechos pasivos de los trabajadores al cumplir 64 años de edad y la simultánea contratación por parte de las empresas de trabajadores jóvenes o perceptores del Seguro de Desempleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas que se pacten con contratos de igual naturaleza que los que se sustituyen». A este *mandato* responde el, Real Decreto-Ley 14/1981, de 20 de agosto, *sobre jubilación especial a los sesenta y cuatro años de la Seguridad Social* [B.O.E. 29 de agosto]. Desarrollado por el Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre, *por el que se desarrolla el artículo del Real Decreto-Ley 14/1981, de 20 de agosto, sobre jubilación especial a los sesenta y cuatro años* [B.O.E. 20 de noviembre de 1981]. Por lo demás, consúltese: Real Decreto-Ley 13/1981, de 20 de agosto, *sobre determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación en la Seguridad Social* [B.O.E. 29 de agosto de 1981], que viene a modificar el artículo 54.1. del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social* [B.O.E. 20 de julio de 1974]. Véase también, Ley 24/1972, de 21 de junio, *de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de Seguridad Social* [B.O.E. 22 de junio de 1972].

³⁷¹ Acuerdo desarrollado por el Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto, *por el que se incrementa la cotización adicional por horas extraordinarias* [B.O.E. 29 de agosto de 1981]. En su artículo 1 se podía leer: «La cotización adicional establecida por el Real Decreto ochenta y dos/mil novecientos setenta y nueve, de diecinueve de enero, sobre la remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas extraordinarias y fijada en el catorce por ciento de su importe, se incrementa en diez puntos, por lo que pasa a ser del veinticuatro por ciento. Un cincuenta por ciento de este incremento corresponderá al empresario y el cincuenta por ciento restante será a cargo del trabajador».

³⁷² No debe minusvalorarse la importancia otorgada a las citadas medidas. Así, por ejemplo, en el caso de las horas extraordinarias se afirma: «También relación al objetivo de estimular la creación de empleo a través de la reducción de horas extraordinarias, las partes han coincidido en la importancia del cumplimiento del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores; el incumplimiento de este artículo será considerado falta grave a efectos de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto».

pequeño paso –a nivel de reordenación jurídica de la política de empleo– a ser incluidas dichas figuras como si se tratarán también de fomento del empleo. A lo anterior se añadiría otro futuro regalo empresarial de la UCD. La “CEOE se compromete a firmar con el Instituto Nacional de Empleo un convenio de colaboración, para la creación de nuevos puestos de trabajo, en prácticas o en formación, orientados fundamentalmente y básicamente a jóvenes sin primer empleo”. Añadiendo, finalmente, “El costo de estos convenios para el INEM será financiado por las empresas, mediante la afectación a estos programas de 0,1 puntos de la cuota de formación profesional”.

Gracias a los acuerdos sociales firmados desde finales de los setenta así como el establecimiento de un siempre débil como incompleto modelo de concertación social; pronto nacería la figura del “consumado” experto capaz de disfrazar –cuando no dar la vuelta– a los diferentes documentos que conforman tales episodios históricos. Así, los textos de los pactos estarán sujetos a no pocas interpretaciones ante su pretendida redacción neutra o al menos lo suficiente ambigua para que cupiera cualquier posible interpretación, en aras de facilitar la propia negociación y su posterior firma. Así sucede con el enigmático apartado “VII. Otros acuerdos”, en donde tras detenerse en el primer punto en las cuestiones relativas a la mejora del cauce administrativo de los ERE con (pretendidos) “criterios de objetividad”; pasa en un segundo punto a señalar lo siguiente bajo el título “VII.2. Desarrollo del Estatuto de los Trabajadores”.

«Aparte de los puestos de trabajo que puedan crearse, o no destruirse, por la aplicación de las medidas de carácter general de política económica y presupuestaria del Gobierno y de la política de las empresas, resultantes de los recursos para la inversión que puedan liberarse con el presente Acuerdo, las partes firmantes coinciden en el importante efecto sobre el empleo pueda tener el desarrollo de las diferentes formas de contratación previstas en el Estatuto de los Trabajadores. A tal fin, el Gobierno promulgará, de forma inmediata, la correspondiente normativa, previa consulta a las Organizaciones Sindicales y empresariales firmantes de este Acuerdo».

No sólo se evitaría en aquella ocasión nombrar la *bicha* de la contratación temporal, sino que es tal la ambigüedad del texto que difícilmente no pudiera ser firmado por ninguno de los agentes sociales implicados. Prácticamente un año se tardaría en saber lo que se venían a decir aquellas líneas. Así con esa “fórmula de compromiso” –objeto característico de cualquier acuerdo social o AI que se precie– se solventaba una de las espinosas cuestiones que a punto hicieron naufragar el ANE.

Ni un mes pasaría para que el citado acuerdo viera sus resultados concretos en el BOE. Todo ello en un tiempo en que frente de la cartera de Trabajo va a estar Jesús Sancho Rof. De hecho, estos mismos Reales Decretos van a ser los primeros publicados en relación al desarrollo del Acuerdo Nacional de Empleo. De esta forma, el ANE se convierte en el verdadero motor del desarrollo legislativo del ET en su vertiente del fomento del empleo. Mientras que la contratación temporal causal no se toca en la práctica –de hecho el RD 2303/1980 no será derogado hasta el RD 2104/1984³⁷³– los supuestos contemplados en el artículo 17.3 se desplegarán a través de cuatro Reales Decretos –de forma directa o *sui generis*– a los que se acompañarán de otros tantos. Un desarrollo que llegaría dieciséis meses después de la aprobación del ET y en un contexto tan especial como único. Estamos así ante el *pack reformista* más amplio del Estatuto de los Trabajadores durante la década de los ochenta, junto con el que tiene lugar tras la RET’84.

Aquellos RRDD tenían de común un conjunto de características. Primero, se establecen, al contrario de sus normativas predecesoras, no pocas cautelas así como límites temporales muy concretos al respecto de su utilización. El principal, que los mismos tan sólo podrían ser empleados hasta el 31 de diciembre de 1982. Esto no significa que no se avance en su

³⁷³ Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre, *por el que se regulan los diversos contratos de trabajo de duración determinada y el contrato de trabajadores fijos discontinuos* [B.O.E. 23 de noviembre de 1984].

liberación-flexibilización, aunque no se haga por igual ni al mismo ritmo en cada una de las figuras consideradas. Sin duda la presión sindical en este campo –por vez primera desde la aprobación no sólo del ET sino también de los propios Pactos de la Moncloa– se advierte sin problema ninguno. Pero con las mismas veremos que se trataría de una presión y una limitación relativas en la práctica.

No se va a seguir aquí de cara a su análisis el orden numérico de la normativa, sino que se reproducirá el esquema que se empleó en el examen del ET, y que además responde a la importancia real laboral de las mismas. Así pues, ha de destacarse, en primer lugar, el Real Decreto 1363/1981, de 3 de julio, *por el que se autoriza la contratación temporal como medida de fomento del empleo*³⁷⁴. Por ser concretos y evitar mayores rodeos: se asiste a la universalización definitiva de la contratación temporal como medida de fomento del empleo. En el campo de las novedades también se ha de reseñar como se señalaría, de forma textual, en su *Exposición de Motivos* lo siguiente: “habiendo consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”, en clara referencia a los acuerdos del ANE. Asimismo por primera vez desde la aprobación del ET se hace uso del artículo 17.3 (artículo 1). Será por y a través del artículo en donde se llega a la citada universalización de la contratación temporal. Aunque se establece hasta cinco posibilidades, el punto 2c) es lo suficientemente amplio para no extendernos más: “2c). Trabajos inscritos como demandantes de empleo en las oficinas de empleo”.

A partir de aquí, en términos históricos, no hay vuelta atrás en este proceso flexibilizador. Por otra parte, y como destacaría Ignacio Flórez:

«Realmente nos encontramos con la universalización de esta modalidad contractual en cuanto a sus sujetos, ya que si alcanza a todos los trabajadores que no tengan empleo porque no lo hayan tenido o porque lo hayan perdido, es claro que esta norma excepcional comprende absolutamente a toda la población laboral. Es más, ya se permite contratar a cualquier persona activa, pues bastará que se inscriba en la correspondiente Oficina de Empleo para ser contratado»³⁷⁵.

Tampoco se puede negar la *generosidad* del legislador cuando se observa como en el artículo 3b) se establece un límite mínimo de tres meses –que en caso alguno daría derecho a recibir ningún tipo de prestación contributiva, según la propia LBE– y un límite máximo de tres años en una progresiva extensión del tiempo de la causa temporal. En segundo lugar, no se establecía ningún tipo de indemnización al finalizar el contrato, quedando en la mano del empleador todas las posibilidades para determinar el final del contrato. Es destacable, igualmente, como esta normativa no incluye ningún tipo de bonificación y/o subvención, en un intento por mantener el equilibrio jurídico con respecto a otras figuras contractuales. La otra gran limitación pensada para evitar que a través de este RD se llevara a cabo un proceso de sustitución de fijos por temporales, la encontramos en el artículo 5.1 en donde se establecen unos límites porcentuales por tamaño de plantilla –límites bastante generosos, por cierto–³⁷⁶. Ahora bien, tan sólo hace ir al punto 5.2 para observar el poder que se otorga a las “Comisiones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo” para en caso de considerarlo necesario modificar los anteriores límites porcentuales.

La *segunda pata* sobre la que va a pivotar el *pack reformista flexibilizador* sería a través del Real Decreto 1364/1981, de 3 de julio, *por el que se establecen normas de fomento del*

³⁷⁴ Real Decreto 1363/1981, de 3 de julio, *por el que se autoriza la contratación temporal como medida de fomento del empleo* [B.O.E. 11 de julio de 1981].

³⁷⁵ FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal...*, op.cit., pp. 73-74.

³⁷⁶ Este preciso punto conllevaría no pocos conflictos normativos a la hora de aplicarlo a sectores como el de la construcción. Tan sería la situación que al siguiente de la publicación de la primera medida en el BOE, se aprobaría un nuevo Real Decreto para determinar con precisión su alcance: Real Decreto 1838/1981, de 3 de agosto, *por el que se interpreta el artículo 5 del Real Decreto 1363/1981, de 3 de julio* [B.O.E. 11 de julio de 1981. Entrada en vigor: 12 de julio].

*empleo para determinados grupos de trabajadores desempleados*³⁷⁷. En la práctica, no se puede hablar de este RD sin tener presente, al mismo tiempo, el RD 1363/1981. De nuevo, el empleo de las prerrogativas contenidas en el artículo 17.3 del ET constituyen el aspecto clave, aunque aquí se va estrechar el número potencial –que no el *real*– de posibles beneficiarios: “trabajadores que hayan agotado la prestación de desempleo, estén subsidiados o no, o de quienes tengan responsabilidades familiares”. Una restricción, pues, bastante *sui generis* y próxima también a la universalización de esta figura.

La gran diferencia con el RD 1363/1981 va a ser que con el RD 1364/1981 se puede acceder a ampliar subvenciones y bonificaciones. Tan sólo el empleador tenía que acudir al INEM, convocar la correspondiente bolsa de trabajo, y seleccionar al *afortunado* entre cinco posibles candidatos, y a partir de ahí solicitar las bonificaciones especificadas en el artículo 2. Subvenciones relacionadas con la cuota empresarial de la Seguridad Social, que se pueden resumir de la siguiente forma: de 6 a 12 meses: 50%; de 12 a 24 meses: 90%; más de 24 meses o por tiempo indefinido: 50% primer año, 75% segundo año. Ahora bien, otra vez los límites –vía presión de los sindicatos, en tanto de nuevo se indica en la *Exposición de Motivos* que los mismos habían sido consultados– eran, en cualquier caso, bastante relativos: así, primero, no se podía “cubrir cualquier puesto de trabajo que haya quedado vacante por despido improcedente” (artículo 2.4); en segundo lugar: “En ningún caso se procederá la bonificación, respecto de trabajadores contratados de nuevo por la misma Empresa, una vez agotado el plazo máximo” (artículo 2.5). O también se establecía el bloqueo de las subvenciones en caso de despidos improcedentes (artículo 3.3.). Sin embargo, en la vía más empleada por los empleadores para despedir, es decir, a través de los ERE –de los conocidos entonces y ahora como *expedientes de crisis*– se establecía un artículo 3.1 en donde se daba una vuelta al anterior artículo que dejaba, en la práctica, manos libres al empresario³⁷⁸. Otro considerable *regalo empresarial* de los Gobiernos de la UCD.

La política de flexibilización pero sobre todo de abaratamiento de la mano de obra juvenil, va a tener su punto fuerte, en el largo lustro de los gobiernos centristas, con el Real Decreto 1361/1981, de 3 de julio, *sobre contratos de trabajo en prácticas y para la formación para jóvenes trabajadores*³⁷⁹. Una normativa bien acompañada de otros dos *regalos empresariales* de la UCD: Orden de 2 de abril de 1982, *por la que se aprueba y asume el Acuerdo suscrito por el Instituto Nacional de Empleo y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales sobre el programa de contrato de trabajo en prácticas y de formación laboral*³⁸⁰; y la Orden 11 de mayo de 1982, *por la que se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones a las empresas que realicen nuevas instalaciones, transformen las existentes o precisen actualizar los bienes de equipo necesarios para impartir*

³⁷⁷ Real Decreto 1364/1981, de 3 de julio, *por el que se establecen normas de fomento del empleo para determinados grupos de trabajadores desempleados* [B.O.E. 11 de julio de 1981. Entrada en vigor: 12 de julio].

³⁷⁸ «Artículo 3.1. No tendrán derecho a la bonificación de la cota empresarial a la Seguridad Social a que se refiere el artículo anterior los empresarios que contraten trabajadores acogidos a este Real Decreto, cuando durante el año inmediatamente anterior a la contratación hayan sido autorizados a la extinción o suspensión de contratos de trabajo con todos o parte de los trabajadores de la plantilla, en virtud de expedientes de regulación de empleo y respecto del Centro de que se trate, salvo que la categoría profesional sea distinta a la de los contratos extinguidos o en suspensión». Real Decreto 1364/1981, de 3 de julio, *por el que se establecen normas de fomento del empleo para determinados grupos de trabajadores desempleados*.

³⁷⁹ Real Decreto 1361/1981, de 3 de julio, *sobre contratos de trabajo en prácticas y para la formación para jóvenes trabajadores* [B.O.E. 11 de julio de 1981. Entrada en vigor 12 de julio].

³⁸⁰ Orden de 2 de abril de 1982, *por la que se aprueba y asume el Acuerdo suscrito por el Instituto Nacional de Empleo y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales sobre el programa de contrato de trabajo en prácticas y de formación laboral* [B.O.E. 14 de abril de 1982].

*enseñanzas de Formación Profesional*³⁸¹. Vaya, por delante, que no estamos ante medidas de fomento del empleo propiamente dichas. Ni siquiera se articularían o se fundamentarían normativamente las mismas por y a través del artículo 17.3 del ET. Nos encontramos ante medidas de contratación común con dos notas a destacar: primero, las mismas no han sido consultadas con los sindicatos; y segundo, no marcan ningún tipo de tiempo temporal de cara a su aplicación.

Como decíamos toda esta normativa estaría guiada por un único fin: garantizar una mano de obra flexible pero sobre todo barata –prácticamente hasta la gratuidad vía financiación estatal– de una parte central del “ejército de reserva del capital”: la jóvenes del *baby boom*³⁸². Se empieza así a desarrollar una política de fomento del empleo juvenil, en donde poco pesará la formación y las prácticas –más allá del buen conjunto de intenciones que se establece en cada normativa– instrumentalizándose las mismas con el fin deseado de reducir sobresalientemente los costes laborales³⁸³.

De la misma forma, ha de reseñarse que se pueden ya dar por concluidos los programas experimentales, para poderse hablarse, en adelante, de la primera etapa de política de empleo juvenil. Una política que se iría perfeccionando a lo largo de las tres siguientes décadas. En verdad, el RD 1361/1981 no hace mucho más que desarrollar el artículo 11 del ET en su perspectiva normativa. Añade realmente poco. Por ejemplo, establece el límite mínimo de 3 meses, manteniendo el máximo de 12 meses. Ahora bien, lo destacable es como se deja sobradamente especificado lo que cobrarán los y las jóvenes que sean empleados mediante este tipo de contratos. En el caso de los contratos en prácticas el artículo 4 nos indicaría lo siguiente:

«Como mínimo se tomará como base de cálculo el ochenta por ciento de la base mínima del grupo de cotización de la Seguridad Social que corresponda, establecida en el artículo primero del Real Decreto ciento treinta y tres/mil novecientos ochenta y uno, de veintitrés de enero, o el salario mínimo interprofesional si el porcentaje citado resultara inferior a él, todo ello en proporción a la jornada de trabajo fijada en el contrato»³⁸⁴.

No es complicado, por tanto, intuir los precarios salarios que a los contratados en prácticas se les podría llegar a abonar a fin de mes. Otro tanto sucede con los contratos de formación. Aquí incluso las ventajas son mayores al no fijarse ningún tipo de tiempo mínimo de duración. Comparten, por lo demás, ambos tipos de contratos como a pesar de que el empresario debe abonar las diferentes cotizaciones, este tipo de trabajo no tendrá “efectos de carencia la pensión de jubilación”. Es decir, tenemos aquí constituida la versión pre-moderna de las *becas* de finales del siglo XX. Una política, por cierto, que a grandes rasgos continuaría durante la *época socialista*.

La conversión de los jóvenes en un “problema social” así como la creación de mecanismos de contratación específicos para los mismos, va a tener notables –mejor dicho,

³⁸¹ Orden 11 de mayo de 1982, *por la que se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones a las empresas que realicen nuevas instalaciones, transformen las existentes o precisen actualizar los bienes de equipo necesarios para impartir enseñanzas de Formación Profesional* [B.O.E. 16 de junio de 1982].

³⁸² Sobre su composición y los efectos de entrada en el mercado véase el trabajo, AGÜERO, Isabel y OLANO, Alberto, “Oferta de trabajo de jóvenes: aspectos demográficos y económicos” en *Los jóvenes y el empleo*. Dossier monográfico, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 1-2, (1988), pp. 12-29. Un texto en el que los autores prefieren hablar de *generaciones numerosas o pletóricas*.

³⁸³ Para el profesor Lorenzo Cachón con este conjunto de decisiones se van a empezar a configurar las primeras medidas de los programas experimentales de empleo juvenil, y todo ello en una clara dirección: «aparece ya un esquema de política de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, que va a tener a la contratación temporal como norma». CACHÓN, Lorenzo, *Políticas de inserción de los jóvenes en los mercados de trabajo en la Unión Europea*, Montevideo, Cinterfor, 1997, p. 94.

³⁸⁴ Real Decreto 133/1981, de 23 de enero, *sobre cotización a la Seguridad Social durante 1981* [B.O.E. 30 de enero de 1981].

sobresalientes– ventajas para la clase empresarial del país³⁸⁵. Bajo este paraguas argumentativo –y asentando tanto en la Disposición Adicional Primera del RD 1361/1981–también se va a poner en marcha los más que rentables convenios de colaboración entre el INEM y la CEOE. Se pasa aquí también ya de los programas experimentales a una etapa de creciente madurez al respecto. La citada Orden de 2 de abril –primera en su género– va a desarrollar las bases maestras de estos “jugosos” convenios de colaboración. Más allá de las ventajas fiscales y de las muy considerables subvenciones, un breve repaso por la misma Orden, nos indica una pequeña pero importante victoria parcial de los empresarios al verse reconocida su “labor social” en el mismo BOE:

«Que las prácticas en el trabajo y las acciones formativas laborales son medios naturales de educación e instrucción hasta el punto de que puede afirmarse que la función empresarial es necesaria, de modo que sin la prestación de la colaboración de la Empresa, tales modalidades de contratación y, en general, todo el subsistema de Formación Profesional, Reglada y Ocupacional, funcionaría en el vacío o con enormes costes añadidos para recrear los ambientes y medios de trabajo».

Yendo a lo concreto, lo realmente trascendente lo vamos a encontrar en la “Clausula Quinta. Seguridad Social y bonificaciones”. Allí, de entrada, en el punto 3 los contratos tanto en prácticas como en formación se “reducirán en un 45 por 100 de la cuota íntegra debida a la Seguridad Social”. El abaratamiento de la mano de obra sigue en la “Clausula Sexta. Otros beneficios económicos específicos”. Y no son pocos. Por ejemplo, iban del punto 1.a) –“Las empresas percibirán del INEM una compensación económica igual al 30 por 100 de la cuota debida a la Empresa a la Seguridad Social, de modo que se garantice una reducción final del 75 por 100 de la cuota íntegra de Seguridad Social”– al punto 2, en donde tras volver a desglosar la reducción de cuotas empresariales. Y finalizándose tal disposición con la siguiente anotación: “Las empresas percibirán, además, una compensación económica con cargo al INEM por cada hora de trabajo en prácticas que supere las treinta semanales, equivalentes al 30 por 100 del valor hora del salario asignado al propio trabajador”. En resumen, se busca una mano de obra prácticamente gratuita, subvencionada y que además pretendía resaltar el papel casi *benefactor* de la patronal. Una normativa que sería toda más “mejorada” a través de diferentes órdenes ministeriales como la ya citada del 11 de mayo de 1982.

El último puntal del *pack reformista legislativo del ET* de los gobiernos centristas se puede localizar en el trato otorgado al contrato a tiempo parcial. Será a través del Real Decreto 1362/1981, de 3 de julio, *sobre contratos de trabajo a tiempo parcial* cuando se comiencen a superar no pocas resistencias, por más que no sigan faltando las cautelas al respecto³⁸⁶. De esta forma, la contratación a tiempo parcial se seguirá interpretando como una especial *medida de fomento del empleo*, sin ni siquiera citarse el art 17.3. Asimismo seguirá destinada a los colectivos concretos contemplados en el artículo 12 así como en la Disposición Transitoria 3 del ET. Todo ello *adornado* de la fórmula: “[e]n tanto persistan las actuales circunstancias de empleo”. Pese a lo anterior, el RD 1362/1981 vendrá a aclarar sus prerrogativas de cara a su mayor utilización a partir del desarrollo de dos aspectos. Primero, el contrato a tiempo parcial podría ser “tanto de duración indefinida como de duración determinada” (artículo 1), pero sobre todo pone *blanco* sobre *negro* las bases de su problemático cálculo de cotización (artículo 6), que posteriormente sería desarrollado por la Orden de 20 de enero de 1982 *por la que se regula, con carácter provisional, el régimen de la Seguridad Social y de desempleo para los contratos a tiempo parcial, a los que se refiere la disposición transitoria segunda del Real Decreto*

³⁸⁵ Asimismo ha de tenerse presente que cerca del final de la I Legislatura se llegaría a ‘Tomar en consideración’ por el Pleno de los Diputados una Proposición de Ley relativa a ‘regulación del contrato de trabajo para la formación laboral’. Nunca más se sabría de aquella iniciativa. BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES. CONGRESO DE DIPUTADOS. *Toma en consideración. Regulación del contrato de trabajo para la formación laboral*, I Legislatura, nº 144-II, 8 de abril de 1982, p. 528/1.

³⁸⁶ Real Decreto 1362/1981, de 3 de julio, *sobre contratos a tiempo parcial* [B.O.E. 11 de julio de 1981. Entrada en vigor: 12 de julio].

1362/1982, de 3 de julio³⁸⁷. No obstante, este esfuerzo normativo sería más que insuficiente para hacer de la contratación a tiempo parcial una medida atractiva de cara a los empleadores.

La última etapa de la política laboral de los gobiernos centristas puede delimitarse —a grandes rasgos— entre diciembre de 1981 a diciembre de 1982, tiempo del mandato de Santiago Rodríguez Miranda al frente del Ministerio de Trabajo. Como todo tiempo de transición, no faltarían las sorpresas e imprevistos de última hora. Aunque el mandato de Leopoldo Calvo-Sotelo expiraba en la primera-verano de 1983 a más tardar, a principios del año ochenta y dos las posibilidades de agotar la legislatura no parecían muchas. Al contrario, la cada más débil posición del Presidente del Gobierno constituía la señal más característica de aquel tiempo político.

En este condensado recorrido, hasta llegar a fines del ochenta y dos, van a sucederse un conjunto de hechos trascendentales de cara a la siguiente legislatura socialista. A lo que se sumarán toda una serie de acontecimientos inéditos dentro del mundo del trabajo. Marcados los primeros meses por una conflictividad media-baja a pesar del ANE —como se destacó en páginas anteriores— también tendrían lugar unas nuevas elecciones sindicales. Y, en aquella ocasión, el enfrentamiento entre UGT y CCOO alcanzaría cuotas insospechadas. Por delante no sólo se llevaría la *frágil* como *temporal* “unidad de acción” alcanzada al final de la negociación del Acuerdo Nacional de Empleo, sino que las constantes denuncias de compra de votos —en donde el “señor del maletín” que visitaba las pequeñas empresas situadas en los polígonos industriales a las afueras de la grandes ciudades cobraría un protagonismo real— terminarían en la “batalla” en el IMAC en febrero de 1983, en lo que sería uno de los episodios más duros y desagradables de la reciente historia del movimiento obrero español³⁸⁸. Tampoco faltarían por parte de Comisiones Obreras las denuncias de la potencial alianza entre UGT y el Gobierno de cara a frenar su avance en las citadas elecciones. Pruebas, de hecho, no faltarían al respecto³⁸⁹. En cualquier caso, UGT —según el IMAC— obtendría la primera posición con el 36,71% y CCOO la segunda con el 33,40%³⁹⁰.

Mientras tanto, el ANE iba a tener una *muerte agónica*. No faltarían sus voluntaristas enterradores. Ello a excepción de Comisiones Obreras y del PCE que seguirían entonces empeñados en su tesis de ir hacia un gran pacto nacional de solidaridad, y en donde el Acuerdo Nacional de Empleo podría ser el inicio del mismo, o al menos, de algo. Por su parte, la CEOE empezaría a desmarcarse política y económicamente del ANE a principios de marzo de 1982, justamente, cuando desde el Gobierno se empezaría a hablar de la posibilidad de renovar el

³⁸⁷ Orden de 20 de enero de 1982 *por la que se regula, con carácter provisional, el régimen de la Seguridad Social y de desempleo para los contratos a tiempo parcial, a los que se refiere la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1362/1982, de 3 de julio* [B.O.E. 30 de enero de 1982].

³⁸⁸ Así la describiría Alberto Oliet Palá: «En realidad la guerra entre ambos sindicatos, que entonces todavía aspiraban a la hegemonía, adquirió una mayor intensidad en los comienzos de esta primera legislatura socialista. Las elecciones sindicales ultimadas en el año 1983 constituyeron uno de esos enfrenamientos encarnizados por la mayoría, que luego fueron siempre una constante. Las acusaciones mutuas de fraude electoral fueron múltiples. CCOO necesitaba ver mantenida su implantación, antaño siempre más consistente. UGT quería recomponer la situación, emulando en el campo sindical la hazaña del PSOE. En esas condiciones se enfrentaron sin piedad para conseguir sus objetivos». OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, *op.cit.*. Noticia, Rodolfo Serrano, “Sólo se computarán los delegados sindicales elegidos entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre”, *El País*, 11 de febrero de 1983.

³⁸⁹ Noticia, José Yoldi, “Desestimado el recurso de CCOO sobre elecciones sindicales de 1982”, *El País*, 17 de diciembre de 1983.

³⁹⁰ Una visión global al respecto en: NAVARRO BOTELLA, Francisco José, *Las elecciones sindicales de 1982*, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1983. Véase, por lo demás, lo apuntado en la *nota 196*.

mismo³⁹¹. En gran medida, la patronal nunca se mostraría entusiasmada con aquel pacto que, en entre otras cuestiones, le garantizaría una aguda política de moderación salarial. Sin embargo, sus ambiciones pero sobre todo sus prevenciones ante la más que segura victoria electoral de los socialistas en el plazo máximo de un año, le conducirían a acentuar tanto su alejamiento de la política económica de la UCD –a la que siempre consideró demasiado blanda cuando no inclusive progresista– y por tanto del ANE. De esta forma, se va instalando la convicción entre los agentes sindicales y los empresarios de cómo cara al año 1983 lo único realista, en su caso, sería un posible Acuerdo Interconfederal limitado a la cuestión salarial.

Por estos senderos entrecruzados va a llegar la última gran contribución a la “causa” de la liberalización-flexibilización del SERL por parte de los Gobiernos de UCD, a través del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, *por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo*³⁹². Empeño y dedicación no se les puede negar ni a Calvo-Sotelo ni a Rodríguez Miranda en tales cuestiones. No obstante, la gran obra final no podría concluirse de forma completa.

En medio de una coyuntura económica deprimida, dominada por la destrucción de empleo y con una escasa movilidad laboral, las medidas contenidas en el *pack reformista* de julio de 1981 se veían constreñidas ante la propia realidad laboral del país, pero también por su escasa difusión. Todo sea dicho. Es en este marco en donde cabe hablar de la última apuesta flexibilizadora de UCD. De hecho, la historia del RD 1445/1982 resulta bastante similar a la de la negociación de un acuerdo interconfederal, un pacto social o directamente una Ley. No faltaría de nada: conspiraciones, traiciones, pactos secretos, movilizaciones y amenazas por doquier, y ello, a pesar de no ser más que un Real Decreto. Hasta esa situación se había llegado en todo lo que tuviera que ver con la ampliación o flexibilización de la contratación temporal.

Con el clásico respecto por las formas institucionales que también sabría cultivar el Gobierno de Calvo-Sotelo y que se prolongaría durante la época socialista, éste anunciaría el 1 de abril de 1982 en una conferencia en el Círculo de Empresarios, que el Gobierno pretendía avanzar en la liberalización de la contratación temporal. Hipótesis que sería confirmada aquel mismo día por el propio Rodríguez Miranda en diversas reuniones con CCOO, UGT y CEOE. Así pues, se pasaba de las *sospechas* y parciales filtraciones previas, a la declarada intención del Ejecutivo de incrementar la contratación temporal por las dos vías hasta ahora conocidas: eliminar cualquier tipo de limitación jurídica e incrementar las bonificaciones a los empresarios. Lo cierto, es que aquel anuncio desataría, de nuevo, todas las alarmas sindicales, mientras que CEOE proseguía su campaña machacona contra el Gobierno y contra quien se opusiera a sus “recetas”³⁹³.

Desde abril hasta finales de junio de 1982, que es cuando el Consejo de Ministros aprobaría el RD 1445/1982, no faltarían los debates ni las movilizaciones. Empezando por los

³⁹¹ Meses más tarde, y según se recogía en una pequeña nota informativa de ABC, la CEOE publicaría un documento sobre la concertación social en donde rechazaría el modelo hasta ahora seguido: «La concertación social no puede mantenerse de modo indefinido bajo los mismos criterios y esquemas, ya que las situaciones cambian y las soluciones también». Un texto en donde se acusaban a los sindicatos si bien no de todos los males, al menos, de incumplir de forma sistemática los acuerdos: «[L]a concertación social no significa la total eliminación de puntos de tensión o de conflicto, aunque, si se establece de modo adecuado, lo reducirá en forma notable. La experiencia indica que la tregua social que ofrecen los sindicatos no llega a ser asumida por estos con todas sus consecuencias, ya que se muestran reticentes frente a las cláusulas de paz social en los convenios». Noticia, “Los acuerdos no pueden establecerse de espaldas al mercado”, ABC, 8 de junio de 1982.

³⁹² Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, *por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo* [B.O.E. 1 de julio de 1982. Entrada en vigor: el 2 de julio].

³⁹³ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno seguirá adelante con el proyecto de decreto que modifica la contratación temporal”, *El País*, 2 de abril de 1982. También aquel día se conocería que los empresarios habían destinado más de 65.000 millones a despidos. Noticia, Rodolfo Serrano, “En 1981 se destinaron más de 66.000 millones a despidos”, *El País*, 2 de abril de 1984.

debates, duras batallas se desatarían en el Consejo General del INEM en donde los sindicatos, reunión tras reunión, conseguirían eliminar los aspectos más radicales del proyecto original, que a tenor de lo que también se filtraría, contenía sin ambigüedades y sin prácticamente límite alguno la total universalización y generalización de la contratación temporal, que, en cierta parte, ya venía precedida en el RD 1363/1981 y en el RD 1364/1981.

Entre otros muchos documentos de carácter interno y/o confidencial que se redactarían durante este tiempo por parte de la UGT, se puede observar como poco a poco todas las alarmas empezarían a desatarse. ¿La razón? La verificación de cómo desde el Gobierno se ponía punto y final a los “acuerdos no públicos” que conducirían a la firma del ANE. Por ejemplo, en un *informe confidencial* de la Secretaría de Acción Sindical de la propia UGT fechado el 18 de mayo, se destacaban cuatro elementos claves en base a los borradores que se venían manejando. Primero, la desaparición de la *excepcionalidad* dada a tal *pack legislativo* en tanto se suprimía la fecha de su conclusión, en un principio, prevista hasta finales de 1982. Por otro lado, se afirmaba literalmente como “[d]esaparece el artículo 2º; que hace referencia a los «trabajadores con los que se podrá celebrar contratos»”. En suma, se procedía, sin titubeos, a su universalización. El tercer punto también reflejaba la voluntad radical flexibilizadora del pre-proyecto al desaparecer del artículo 3º toda una serie de derechos y condiciones laborales. Y, por último, se afirmaría la gravedad que suponía la ampliación porcentual de contratos temporales por empresas. De este modo, y ya en otro *informe* de la UGT por aquellas fechas no se dudaría en afirmar como tal proyecto “introduce aspectos regresivos y perjudiciales para los trabajadores”, y se procedía a una “flexibilización de la contratación temporal de forma indefinida”³⁹⁴.

Pero también en la calle tendría lugar la primera movilización –que se conozca y así pueda ser catalogada– contra la flexibilidad en sentido estricto. Tal acontecimiento tendría lugar el lunes 7 de junio, y constituiría todo un fracaso como reconocerían los propios sindicatos, quienes llegarían a calificarlo –de cara a encubrir las *apariencias*– de mera “jornada de reflexión”. Dicha movilización también estaría convocada por el cumplimiento del ANE y la defensa de los puestos de trabajos. Quedaba, pues, claro que por más oposición que desatara los proyectos de contratación temporal en las cúpulas sindicales –quienes todavía pensaban que tenían *guardado un as en la manga*– el rechazo en la calle no era perceptible ni constituía propiamente un elemento movilizador. Por cierto, aquel mismo día Joaquín Almunia –según recogía Rodolfo Serrano, el cronista principal de *El País* durante aquellos años– señalaría como se “había llegado al límite de lo necesario [en materia de contratación temporal] y que nada garantizaba que con una mayor flexibilidad de plantillas se diera una mayor oferta de empleo”³⁹⁵. Una de esas frases que más pronto que tarde se volverían en su contra.

Aprobado el RD 1445/1982 en el Consejo de Ministros del 25 de junio, el sábado 26 saltaba a la prensa el “acuerdo secreto” que había facilitado un año antes la firma del ANE. ¿Casualidad? No. En política no existen las casualidades. En verdad, serían dos los acuerdos/pactos secretos. Ahora bien, antes de concretar los contenidos de los mismos, se introducía así un elemento que estaría presente en las siguientes negociaciones de los acuerdos y/o pactos sociales. La mayoría terminarían relevándose con el paso del tiempo, aunque en ningún caso el secretismo duraría un año como en el ANE. Sin duda aquellos eran otros tiempos.

Como decíamos en realidad se pactarían dos grandes acuerdos secretos. Como tales, los mismos constituían un *boomerang* que podía dañar por igual a los firmantes del mismo, además de restar credibilidad al ANE en su conjunto. El primer acuerdo secreto saltaría a la “luz

³⁹⁴ AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Sindical, “Principales anomalías: contratación temporal (nuevo proyecto). Confidencial. 18.5.1982”, sig. 002286-003; AHFFLC, UGT, “Programa de fomento al empleo y nuevas formulas de contratación”, mayo 1982?, sig. 02288-002.

³⁹⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “Indiferencia general en la primera jornada de movilizaciones convocada por los sindicatos en contra del paro”, *El País*, 8 de junio de 1982.

pública” el mismo día de la firma del ANE aunque sus detalles concretos tardarían en conocerse algunos meses. En concreto, durante la negociación de los PGE. Consistía el mismo, a su vez, en dos puntos, que se conocerían por la publicación de un documento a través de la Agencia EFE³⁹⁶. Por un lado, el Gobierno se comprometía a elaborar un inventario de los edificios del patrimonio sindical acumulado hasta el 9 de junio, y estudiar las formulas para entregárselos a los sindicatos en usufructo o cesión. La segunda parte de aquel acuerdo tendría su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado de los tres años siguientes –1982, 1983 y 1984– a través de una partida global de 800 millones de pesetas anuales en “concepto de subvención a la consolidación sindical y “a cuenta de cualquier futura liquidación del patrimonio sindical”³⁹⁷. 800 millones de pesetas a repartirse, según los resultados de las últimas elecciones sindicales celebradas en 1980, entre los diferentes sindicatos. Aquello se cubriría en el BOE –según las propias las *instrucciones* de la Subsecretaria de Empleo y Relaciones Laborales– con los siguientes argumentos: de “cara a la realización de actividades Socio-culturales, promoción de los trabajadores, organización de actividades de carácter formativo y otras dentro de los fines propios de aquéllas”³⁹⁸.

Por cierto, en aquella ocasión –como indicaría Luis Enrique de la Villa– la “CEOE, molesta por haber sido puenteadada, acusó al Gobierno de tahr”. Como también recuerda el citado profesor hasta el cobro de aquella “subvención” pasaría un largo tiempo. Ello debido el recurso contencioso-administrativo que presentaría la CNT. La sentencia de la Audiencia Nacional reconocería que el sindicato anarco-sindicalista llevaba razón al declararse nulas las propias Instrucciones Administrativas y modificar los criterios de representatividad que el Gobierno había otorgado en tal reparto³⁹⁹. Aquel retraso junto con el citado proceso judicial, a la postre, comenzaría a levantar las fundadas sospechas de otros posibles acuerdos secretos en el ANE. Sospechas confirmadas sibilinamente por el propio Nicolás Sartorius en el Congreso de los Diputados un 24 de marzo, quien en una interpelación al Gobierno al respecto llegaría a decir: “Se encontraba de esta forma un cauce, que se entendía acertado por ambas partes, para solucionar uno de los problemas más importantes para la consolidación del mundo sindical”⁴⁰⁰.

Tres meses más tarde se conocería el segundo gran acuerdo secreto del ANE. Cuando ni siquiera había sido publicado en el BOE el RD 1445/1982, se filtraba el mismo a la prensa el 26

³⁹⁶ Véase el mismo en, VILLA, Luis Enrique de la y GARCÍA BECEDAS, Gabriel, *Leyes sindicales...*, op.cit..

³⁹⁷ Ley 44/1981, de 26 de diciembre, de *Presupuestos Generales para 1982* [B.O.E. 29 de diciembre de 1981]. Véase el artículo 48 del Capítulo 4 al respecto; y, Orden de 15 de enero de 1982, sobre el plan de disposición de fondos del Tesoro Público, a aprobar por el Gobierno, en cumplimiento del artículo 77 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria [B.O.E. 30 de enero de 1982].

³⁹⁸ “Instrucciones de la subsecretaria de Empleo y Relaciones Laborales para la distribución de subvenciones a los sindicatos representativos (Dirigidas al Director General de Servicios con fecha de 9 de marzo)”. Documento consultable en, VILLA, Luis Enrique de la, *Panorama de las...*, op.cit., p. 209. El reparto sería de la siguiente forma: Comisiones Obreras: 341.618,279 pesetas; Unión General de Trabajadores: 323.985, 110; Unión Sindical Obrera: 96.105,140; Solidaridad de Trabajadores Vascos: 27.051,418; y Intersindical Nacional Gallega: 11.240.053.

³⁹⁹ Véase: “Sentencia de la Audiencia Nacional anulando las instrucciones de la subsecretaria de Empleo y Relaciones Laborales para la distribución de las subvenciones a sindicatos representativos. Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 de octubre de 1982” (Rec. Núm. 16.624). Documento que se puede consultar en, VILLA, Luis Enrique de la, *Panorama de las...*, op.cit., pp. 210-213. E igualmente: Orden de 18 de noviembre de 1982, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Confederación Nacional de Trabajo (C.N.T.) [B.O.E. 15 de diciembre de 1982]

⁴⁰⁰ VILLA, Luis Enrique de la, *Panorama de las...*, op.cit., pp. 75-76. Las declaraciones del diputado comunista Nicolás Sartorius en: BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, *Interpelación. Incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos sobre devolución del Patrimonio Sindical*, I Legislatura, nº 871-I, 24 de marzo de 1981, pp. 2227-2228.

de junio como ya se mencionó. Debe destacarse que tras las primeras filtraciones interesadas se hablaría, primero, de un documento secreto firmado inclusive por Juan Antonio García Díez y Jesús Sancho Rof para al final quedar el asunto en un supuesto “Pacto de Caballeros”. Lo único cierto, es que a día no se conoce el posible documento y/o acuerdo secreto.

Filtrado por *El País*, a través del periodista Rodolfo Serrano, también se desconoce quién sería el interesado o interesados que proporcionarían tan delicada información, y que venía a dejar a los sindicatos en una situación más que complicada. De la siguiente forma Serrano daba a conocer los entresijos de aquel *acuerdo secreto*:

«La decisión del Gobierno de presentar un nuevo decreto que modifica y amplía la normativa existente en materia de contratación temporal rompe un acuerdo, hasta ahora secreto, suscrito paralelamente a las negociaciones del Acuerdo Nacional de Empleo por el vicepresidente económico, Juan Antonio García Díez y el entonces ministro de Trabajo, Jesús Sancho Rof, con los representantes sindicales. El pacto, en el que se fijaban los límites en que habría que moverse la contratación temporal, fue una condición impuesta por los sindicatos para firmar el ANE».

Se continuaba allí indicando como los sindicatos forzarían tal *acuerdo*, pues no sólo les era complicado justificar en el “nuevo sacrificio salarial exigido a los trabajadores”, sino que además un nuevo *giro* en la contratación temporal conllevaría mayor “inestabilidad laboral”. De ahí la ambigua fórmula de compromiso del propio ANE en su punto VII.2. Por esta vía, los sindicatos conseguirían –a su juicio– evitar la total flexibilización de las plantillas, vista “la imposibilidad de retrasar el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación”, tal y como sucedería con el *pack reformista* de junio de 1981.

Ahora bien, en aquella información también se dejaba abierto un espacio a dudas y a sospechas unas líneas más adelante, al afirmarse que el *acuerdo* lejos de estar firmado tenía en “realidad carácter de «pacto entre caballeros»”. “Los partes firmantes sabían lo difícil que sería remitirse al mismo en caso de incumplimiento”, añadía para concluir aquella crónica con un mensaje: “[E]l Gobierno sería el último en desempolvar un acuerdo que sólo le comprometía a él”⁴⁰¹.

No faltarían en los días siguientes los desmentidos ni las explicaciones, en verdad, pocos convincentes por todas las partes. Así el domingo 27 se daban a conocer las reacciones sobre la filtración del acuerdo secreto. Miguel Cuenca, Subsecretario de Empleo, se limitaría a indicar que “desconocía la existencia de un acuerdo entre Gobierno y sindicatos”. Una forma poco honrosa de salir del paso. Sin embargo, no se terminarían de despejar las dudas sobre los alcances del mismo, sobre todo cuando se decía al respecto del futuro RD 1445/1982 como el mismo había sido “inesperadamente discutido y aprobado anteayer”, en un claro síntoma de las prisas del Gobierno al respecto, pero también de las divisiones internas de la propia UCD como días más tarde se pudo saber⁴⁰². Interesantes también serían las reacciones no sólo de la UGT, sino concretamente de CCOO en boca de Antonio Gutiérrez quien señalaría como “el Gobierno, con la aprobación del decreto, incumple cuantos compromisos había asumido con los sindicatos a raíz de la firma del ANE”. Otra forma prudente de afirmar lo pactado en secreto con o sin documento de por medio⁴⁰³.

En las siguientes semanas y meses los sindicatos tratarían de evitar que el RD 1445/1982 llegara a aplicarse en base a una teórica falta de legalidad. Algo complicado de demostrar en tanto el Consejo de Estado en un Dictamen de 17 de junio había dado el visto bueno. Así tanto UGT como CCOO presentarían un recurso contencioso-administrativo en la

⁴⁰¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los cambios en la contratación temporal rompen un acuerdo secreto entre Gobierno y sindicatos”, *El País*, 26 de junio de 1982.

⁴⁰² Véase al respecto, Noticia, Fernando Jáuregui, “La división de UCD puede materializarse en la votación de esta tarde”, *El País*, 28 de junio de 1982.

⁴⁰³ Noticia, Rodolfo Serrano, “El subsecretario de Empleo afirma desconocer el pacto secreto con los sindicatos sobre contratación temporal”, *El País*, 27 de junio de 1982.

Sala 3ª del Tribunal Supremo. Aquello no llegaría a ningún puerto, más cuando tras la victoria de PSOE en octubre de 1982, optaría por la *retirada judicial*. Mientras tanto, los comunistas llegarían a presentar –también con muy pocas posibilidades de éxito– una Proposición no de Ley para derogar el citado RD. Aquella Proposición de Ley llegaba tan tarde que las Cámaras habían quedado disueltas tras la entrada en vigor del Real Decreto 2057/1982⁴⁰⁴. Como recordaba el propio Landelino Lavilla, tal “Proposición no de Ley le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 207 del Reglamento de la Cámara”⁴⁰⁵. En realidad, dichos intentos – como se ha dicho– estaban condenados de antemano al fracaso, pero ante todo revelarían el escaso entusiasmo puesto por los sindicatos en tales tareas, una vez que se había dado por pérdida aquella *batalla* de antemano.

Visto con perspectiva, los sindicatos saldrían, en suma, mal parados del ANE. Por un lado, aceptarían la perpetuación de la moderación salarial, mientras que, por otro, no frenarían, en la práctica, la extensión de la contratación temporal. Y además, a partir de la filtración – probablemente desde el Gobierno o de sus entornos más próximos si se lee en entrelineas lo mencionado por el propio Rodolfo Serrano– quedaba remarcada la sensación colectiva cada vez más extendida entre la opinión pública, que los sindicatos si no se habían vendido –eso sí por una jugosa cantidad– lejos no estaban. O en otras palabras, habían cedido e intercambiado mayores dosis de flexibilidad a cambio de patrimonio sindical y de un cuota monetaria fija a tres años en los Presupuestos Generales.

No serían días fáciles ni para UGT ni para CCOO. Por ejemplo, Marcelino Camacho en una reunión del CS de CCOO negaría tal acuerdo: “Todo lo que ha habido en el Acuerdo Nacional sobre Empleo se conoce, y Comisiones Obreras no tiene ningún documento secreto”. Otra forma honrosa de salir del paso ante sus afiliados, cuadros y militantes a los que, a buen seguro, se les había ninguneado tal información. Con las mismas también añadiría que el “Gobierno incumple sus compromisos en materia de contratación temporal, que los hubo”⁴⁰⁶.

Loable, en todo caso, era la intención del último Gobierno de UCD al proponer refundir en un solo RD el *pack reformista* de junio de 1981, así como toda la normativa dispersa sobre trabajo de minusválidos, de mujeres con responsabilidades familiares –artículo 30 al artículo 32– trabajo de colaboración social, autónomo... que desde la aprobación del ET se había venido publicando en el BOE. El texto del RD 1445/1982, en cierta parte, no dejada de ser un texto de circunstancias, en donde no sobresalen, precisamente, los grandes argumentos o explicaciones. Así en la “pobre” *Exposición de Motivos* se indicaba, en primer lugar, lo siguiente: “La experiencia obtenida con la aplicación de las diversas medidas de fomento del empleo [...] han aconsejado la introducción de algunas modificaciones que agilicen su utilización”. Remarcando como se “ha estimado conveniente asimismo unificar las distintas disposiciones que regulaban diversas modalidades de contratación o establecían determinadas normas de estímulo para fomentar el empleo”. Todo ello con el legítimo fin de facilitar un “mejor conocimiento y más amplia difusión de ellas, y consiguientemente, una más generalizada utilización”. Argumentos básicos, pues, los esgrimidos. Así mismo ha de reseñarse que en esta ocasión ya no se habla, por ejemplo, ni de contrato de calidad y/o de pleno empleo. A lo sumo de “consecución de unos índices de contratación más elevados, lo que permitirá reducir la tasa de desempleo”.

El grado de liberalización-flexibilización que se acomete con el RD 1445/1982, en definitiva, sería bastante limitado dentro del contexto en el que nos movemos. De esta forma, las presiones sindicales darían, pese a todo lo dicho, sus frutos aunque, eso sí, de forma parcial.

⁴⁰⁴ Real Decreto 2057/1982, de 27 de agosto, *de disolución de las Cortes Generales y fijación de la fecha de las elecciones* [B.O.E. 30 de agosto de 1982].

⁴⁰⁵ BOTELÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, *Proposición no de Ley. Derogación del Real Decreto 1.445/1982, de 24 de junio. Presentada por el Grupo Parlamentario Comunista*, I Legislatura, nº 967-I, 31 de agosto de 1982, p. 2499.

⁴⁰⁶ Noticia, “CCOO no tiene ningún documento secreto del ANE, según Camacho”, *El País*, 30 de junio de 1982.

Es decir, se frenarían las aspiraciones radicales liberales de la UCD en este campo. En ello también tendría parte de responsabilidad la propia CEOE ante su actitud pasiva de dejar pasar las cosas. Su razón principal: su convencimiento de la escasa utilidad del futuro RD al vincularse tan sólo en el tiempo a menos de 6 meses, al finalizar su vigencia el 31 de diciembre de 1982 (artículo 4). Había, pues, que guardar energías y fuerzas para tiempos que se avecinaban “tormentosos”. Pese a lo anterior, este RD, en suma, va a venir a confirmar la “degradación progresista de la estabilidad en el empleo”⁴⁰⁷. Veamos, las razones.

Como se acaba de remarcar las novedades finales del RD 1445/1982 serían bastante menores. Con todo, algunas han de destacarse, y, en ningún caso, han de perderse de vista los detalles menores. En resumen, como destacaría un *duro* informe de la UGT, en el RD 1445/1982 “la mayoría de sus artículos copia íntegramente la legislación vigente o bien introduce aspectos regresivos y perjudiciales para los trabajadores”⁴⁰⁸. De entrada, en el artículo 3 dentro del apartado de “Disposiciones comunes”, se habla de cómo los “Empresarios podrán contratar con arreglo al presente Real Decreto a trabajadores desempleados que se encuentren inscritos en la Oficina de Empleo en el momento de la contratación”, eliminándose el requisito formal –y, por tanto, sin consecuencias prácticas– de los 15 días previos de inscripción.

La “Sección Primera” estaría dedicada a la contratación temporal –del artículo 4 al artículo 10–. Aquí la única novedad –no menor– será la generosa ampliación de los límites porcentuales de contratación temporal por plantilla. Así es cuando se compara el artículo 6 del RD 1445/1982 con el artículo 5.1 del RD 1363/1981⁴⁰⁹. Todo un mensaje a los empresarios –especialmente a los que tenían menos de 50 trabajadores en plantilla– de los cada vez menos límites de cara a configurar plantillas, prácticamente, a base de trabajadores temporales si así lo querían. No obstante, todas estas limitaciones no dejan de tener un carácter formal, al reproducirse en el RD 1445/1982 el artículo que otorga las prerrogativas necesarias a las Comisiones Provinciales del INEM de cara a modificar los anteriores límites, según su propia redacción del artículo 6.2.

La contratación temporal a tiempo parcial –que no terminaba ni terminaría de arrancar hasta tiempo después y siempre de forma limitada– apenas sufría modificación alguna (Sección Segunda. Contratación a tiempo parcial. Artículo 7 al artículo 10). Prácticamente sucedería lo mismo con los contratos en prácticas y en formación. Se continuaba, pues, con la política de mano de obra barata, flexible y subvencionada del RD 1361/1981 (Sección Tercera. Contratación en Prácticas y para la Formación. Artículo 11 al artículo 20). En todo caso, se refuerza el carácter subvencionado de tal tipo de trabajo al establecerse en un RD –que no en una simple Orden ministerial– las “becas y otras ayudas económicas” relacionadas con los

⁴⁰⁷ CASA BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y...”, *op.cit.*, p. 325.

⁴⁰⁸ AHFFLC, UGT, Gabinete Técnico Confederal, “Programa de Fomento al empleo y nuevas formulas de contratación”, Madrid, 1982, sig. 002288-002.

⁴⁰⁹ Mientras que en el artículo 5.1 del RD 1363/1981 se podía leer lo siguiente: «Plantilla de más de mil trabajadores, cinco por ciento; entre quinientos y mil trabajadores, diez por ciento; entre doscientos cincuenta y quinientos trabajadores, quince por ciento; entre cien y doscientos cincuenta trabajadores, veinte por ciento; entre cincuenta y cien trabajadores, veinticinco por ciento; menos de cincuenta trabajadores, treinta por ciento». Real Decreto 1363/1981, de 3 de julio, *por el que se autoriza la contratación temporal como medida de fomento del empleo*. Por otro lado, en el artículo 6.1 del RD 1445/1982 se indicaba: «a) Plantilla de más de mil trabajadores: diez por ciento; b) Entre quinientos uno y mil trabajadores: el quince por ciento; c) Entre doscientos cincuenta y uno y quinientos: el veinte por ciento; d) Entre cincuenta y uno y doscientos cincuenta: el veinticinco por ciento; e) Hasta cincuenta trabajadores: el cincuenta por ciento si bien se podría llegar hasta el cien por ciento previa comunicación a la Dirección Provincial del INEM». Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, *por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo*.

convenios de Empresa (artículo 18.2)⁴¹⁰. También es de destacar que se prohibirá emplear este tipo de contratos para lo que se denominada “prácticas profesionales realizadas por estudiantes al amparo de la legislación educativa como parte integrante de sus estudios académicos” (artículo 20.2). En esta misma línea también se van a mejorar las condiciones establecidas en el RD 1364/1981 en relación a la concesión de subvenciones. No suponen, ciertamente, un giro radical pero si una mejora en términos porcentuales de las mismas –Capítulo III. Sección Primera. Artículo 21 al artículo 23–.

A buen seguro, el “Capítulo IV. Medidas de fomento de empleo de carácter territorial” – artículo 33 al artículo 37– haya sido el aspecto menos destacado del RD 1445/1982, a pesar de que, a nuestro juicio, constituya la más apreciable novedad del mismo, tanto por su contenido normativo como lo que de *nuevo* implica el mismo. Desde que se iniciaría la *vorágine flexibilizadora*, allá por 1977, ninguna normativa –más allá del siempre citado artículo 15 del ET– se había detenido en la posibilidad de subvencionar la “creación de puestos de trabajos a Empresas que contraten por tiempo indefinido trabajadores en desempleo inscritos en las Oficinas de Empleo” (artículo 33). Las condiciones establecidas en el artículo 32 dan a esta medida un carácter universal: “Podrán solicitar los beneficios aquellas Empresas que realicen inversiones, ya sean de nueva creación o por ampliación de las establecidas”. Todo ello acompañado por importantes ayudas económicas y no económicas de todo tipo (artículo 34)⁴¹¹. Las únicos requisitos reales eran contratar a un trabajador de forma indefinida (artículo 35c) y “mantener el nivel de empleo durante tres años de manera que la plantilla se incremente, al menos, con los trabajadores subvencionados”. He aquí otro de los últimos *regalos empresariales* de la UCD.

A su vez, el RD 1445/1982 proporcionará otro pequeño-gran regalo a la clase patronal. Nos referimos a los considerados “Trabajos temporales de colaboración social” –Capítulo V. Artículo 38 al 39–. En una lectura e interpretación más restrictiva tanto del ET como concretamente de la LBE, aquellas medidas se convertirían en toda una “política de chantaje”. Más allá de las condiciones económicas, del tiempo de duración y otras características, lo trascendente reside en el artículo 38.3:

«Los trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo vendrán obligados a realizar los trabajos de colaboración social para los que hubieran sido seleccionados. La renuncia no motivada de los mismos dará lugar a la suspensión de las prestaciones por desempleo durante un período de seis meses de acuerdo con lo establecido en el artículo veintidós de la Ley Básica de Empleo».

He aquí la futura matriz sobre la que sustentarán los Gobiernos socialistas la abierta culpabilización –o al menos sospecha– sobre la *actitud no activa* de los parados. Una política que encubierta bajo el argumento/pretexto de la lucha contra el fraude en el desempleo –y otras ideas similares– llevaría a una abierta búsqueda de culpables de la situación económica y social, precisamente, en el seno de la clase asalariada.

⁴¹⁰ «Artículo 18.2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las becas y otras ayudas económicas similares que puedan establecerse en los oportunos convenios con las Empresas para aquellos contratos en los que, por necesitar de un tiempo de formación teórica amplio, la retribución por el tiempo realmente trabajado sea inferior al setenta por ciento del salario mínimo interprofesional. Dichas ayudas o becas, que en ningún caso, tendrá el concepto de retribución por el tiempo de trabajo realmente realizado, serán suficientes para garantizar una percepción global equivalente a dicha cantidad». Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, *por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo*.

⁴¹¹ «Artículo 34.1. Los beneficios que se establecen son los siguientes: a) Una subvención de trescientas mil pesetas a cargo del Instituto Nacional de Empleo, por cada puesto de trabajo creado; b) Formación Profesional gratuita y prioritaria a cargo del Instituto Nacional de Empleo para los trabajadores contratados cuando la Empresa así lo solicite; c) Una bonificación equivalente al cincuenta por ciento la cuota empresarial a la Seguridad Social, por trabajador contratado, durante tres años». Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, *por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo*.

Hasta aquí llegaría la primera etapa de la profunda metamorfosis del SERL y más concretamente de la contratación temporal. No son pocos los cambios a los que se asisten como hemos tenido la oportunidad de comprobar. Quizás uno de los más importantes sea, justamente, el reforzamiento del papel que juegan los poderes públicos en la introducción de la flexibilidad laboral. De esta forma, se asienta todo un “ideario flexibilizador” que, en breve, será repetido casi de forma mimética por los gobiernos socialistas, y cuyo fundamento principal reside en tres grandes *ideas-fuerza*: a) la *crisis económica* como justificación para adaptar, flexibilizar y “modernizar” el SERL; b) la *rigidez* del marco de relaciones laborales que imposibilita la recuperación económica, desincentivando a su vez la inversión privada frente a las posibilidades que abre la *flexibilización*; c) tal y como se ha podido observar a través de las diferentes *Exposiciones de Motivos* de las numerosas Leyes y Reales Decretos, las mismas conllevan una *fuerte subjetividad* en relación a la ampliación de los *beneficiarios* de la contratación temporal.

Quedan así trazadas las líneas de actuación y proyección sobre las que se asentarán, en muy buena medida, los socialistas su política laboral en una primera etapa. Pero no terminan ahí, ni mucho menos, los problemas reales y urgentes que tendrán que afrontar los mismos. La transición política y social lejos de estar asentada y/o consolidada, seguía presentando numerosos rasgos inquietantes. Tan inquietantes como que todavía el Capitán General de la IV Región Militar –Cataluña– José Sáenz de Santa María tuviera que dejar bien claro que el Ejército asumía el Gobierno que había salido de las urnas el 28 de octubre de 1982 a finales de noviembre⁴¹².

Si la transición todavía estaba en vías de consolidación en el ámbito político y social, con respecto al *mundo del trabajo* la situación, en términos generales, todavía llevaba más retraso. A la extendida violencia policial y parapolicial –con no pocos obreros asesinados durante los gobiernos centristas, y todavía hoy olvidados e ignorados por la memoria oficial/hegemónica⁴¹³– se sumaba la extendida represión y control –legal e ilegal– contra el movimiento obrero. De esta forma, y a menos de quince días de que Felipe González asumiera el Gobierno, gracias a *El País* se conocía como los últimos reductos de la temible Brigada Político-Social no habían querido ser desmontados por los ejecutivos de UCD⁴¹⁴. La noticia, firmada por los periodistas Miguel Barroso y Javier García, venía a constar no sólo la perpetuación de una de las herencias represivas del franquismo, sino su continuación en los muy *supuestos* tiempos democráticos. Objetivo: controlar, fichar y perseguir –como en el franquismo– a los *disidentes*, a los *cabecillas*, de un aún “temido” movimiento obrero.

«Las brigadas de información existentes en la mayoría de las jefaturas superiores de policía han seguido manteniendo hasta ahora *grupos de información laboral*, compuestos por los mismos funcionarios que actuaban en el seno de las antiguas brigadas político-sociales, y han venido elaborando regularmente, y con los criterios de antaño, informes policiales acerca de la conflictividad laboral y las actividades de los sindicatos legales, según ha podido saber este periódico de fuentes solventes del Ministerio del Interior».

La gravedad del asunto no termina ahí, es decir, en seguir manteniendo con dinero público un cuerpo parapolicial no asentado en legalidad y control alguno; iba más lejos, pues

⁴¹² Noticia, X.B., “Sáenz de Santa María manifiesta la sumisión del Ejército al Gobierno salido de las urnas”, *El País*, 20 de noviembre de 1982. Al día siguiente –en otra maniobra en tiempo de descuento por parte de la UCD– se conocían los últimos movimientos para colocar determinados rangos militares en acuartelamientos muy concretos. Noticia, “Nueve ascensos militares, publicados ayer en el BOE”, *El País*, 20 de noviembre de 1982.

⁴¹³ A lo anterior ha de añadirse la violencia de los futuros GAL. Uno de otros tantos ejemplos: Noticia, José Luis Barbería, “Tres trabajadores, gravemente heridos en un atentado en Rentería”, *El País*, 19 de noviembre de 1982.

⁴¹⁴ Véase aquí la bibliografía apuntada en el Capítulo 3, *nota* 253, Capítulo 4, *nota* 80, *nota* 181 y *nota* 258.

como se informaba a continuación estos mismos “Grupos de Información Laboral” habían seguido ejerciendo sus funciones a pesar de las ordenes de sus superiores: “A pesar de peticiones expresas de altos funcionarios de Interior en el sentido de que tales trabajos dejaran de ejercitarse, en muchas ciudades se han seguido manteniendo estos *grupos de información laboral*”. Aquí se reproducía –eso sí con un considerable retraso en el tiempo, insistimos de nuevo– la situación que había tenido que afrontar el primer Gobierno democrático de Suárez con respecto al Servicio Militar de Información.

Todo lo anterior se tornaba aún más inquietante cuando también se conocían como habían sido los “propios gobernadores civiles de algunas ciudades” quienes insistieron en que les siguiera dando, a través de dichos, *grupos* “cumplida información de la actividad laboral”. En una desacertada expresión de los periodistas al calificar como “absurda” la situación descrita, el asunto había trascendido finalmente a la prensa al iniciarse la “reorganización general de la jefaturas de cada una de las regiones policiales”⁴¹⁵. Por cierto, nunca más se sabría –al menos por la prensa o más concretamente por *El País*– sobre aquellos “Grupos de Información Laboral”, cuyo solo descubrimiento evidenciaba la perpetuación en el tiempo de una de otras tantas cloacas del anterior régimen.

En resumidas cuentas, el franquismo seguía estando muy presente. En la sociedad, en el ejército, en la magistratura, en los cuerpos de seguridad... Ahora bien, no se convertirían los socialistas tras su conquista del poder político, precisamente, en unos *entusiastas* de desmontar todo este aparato de poder paralelo. De hecho, no llevarían a cabo purga ninguna e inclusive antiguos mandos franquistas reconvertidos a su nueva condición de “demócratas de toda la vida”, serían rápidamente ascendidos durante aquel tiempo. Así pues, la perpetuación del franquismo por otros medios y por otras vías todavía duraría varios lustros, tal y como se podría comprobar con las represivas actuaciones de los cuerpos de seguridad en los cientos de manifestaciones u otras acciones de lucha, que acompañarían a las agitadas legislaturas socialistas, y que terminarían también con otro notable puñado de obreros asesinados por la ya entonces “policía democrática”.

9.3.3. Meses de transición entre dudas y certezas. *El cambio titubeante* (diciembre 1982-febrero 1983)

«De modo directo y evidente, el paro nos sitúa ante la degradación ética y material a la que se ve sometido el hombre o la mujer a quien la sociedad no es capaz de proporcionar trabajo, que a todos nos angustia y sobrecoge. Degradación solo comparable a la que recae sobre la sociedad que no es capaz de reaccionar ante ese drama que asola a un parte de la misma».

Joaquín ALMUNIA, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (1982-1986)⁴¹⁶.

¿Cómo afrontaron los socialistas, una vez en el poder, dicha “situación de emergencia”? ¿Qué política laboral se podía esperar? ¿La propia del *programa electoral*? O

⁴¹⁵ Noticia, Miguel Barroso y Javier García, “Los «grupos de información laboral» de la policía continúan funcionando”, *El País*, 17 de noviembre de 1982. Allí también se destacaba lo siguiente: «Según ha podido saber este diario en medios policiales, los *grupos laborales* han continuado reuniendo a lo largo de los últimos años material reservado acerca de las actividades de los sindicatos legales, datos en torno a la conflictividad laboral y a la acción sindical desplegada en el interior de las empresas en el ejercicio de los derechos constitucionales, de los trabajadores [...]. En la mayor parte de las ocasiones la plantilla de funcionarios policiales que desempeñaban anterior las tareas de información laboral siguen realizando la misma labor, y los sistemas de comprobación, métodos y criterios de acumulación de material informativo se mantienen inalterados».

⁴¹⁶ AHFFLC, Joaquín Almunia, “Las relaciones laborales y la crisis económica”, sig. AI-502-03. Conferencia pronunciada el 26 de enero de 1984 en el Club Siglo XXI.

bien, ¿imperaría una vez más el consabido realismo material del que habían venido haciendo gala los socialistas desde su particular *transición*?

No pocas cuestiones de relevancia se han adelantado. Por ejemplo, ya ha quedado suficientemente claro en el apartado anterior como lejos de supuestas y/o hipotéticas *contradicciones del socialismo*, lo que prevaleció fueron, sencillamente, fuertes convicciones en el terreno económico. A modo de *fe política* para más señas. De hecho, los equilibrios entre teoría y práctica que tendría que realizar en el terreno económico, se reproducirían sobre muy similares bases en lo referente a la política de empleo. La *prudencia* y la *ambigüedad* se convertirían, de nuevo, en los principios de funcionamiento clave. Todo ello teniendo presente como las numerosas propuestas de avanzar, sin mayores contratiempos, en el camino de una mayor flexibilización del marco de relaciones laborales, se había constituido en una materia altamente sensible dentro y en las cercanías de la *familia socialista* en su conjunto.

Con mayor o menor convicción, con mayor o menor éxito de movilización, con mayor o menor intensidad discursiva, los cuadros socialistas tuvieron en su continuada reelaboración programática un especial cuidado en este punto. No era para menos. Primero, por la sencilla evidencia estadística de que la flexibilización/liberalización del SERL en nada o poco había ayudado a mejorar la situación del mercado de trabajo. De hecho, los propios socialistas emplearían la creciente temporalidad del mercado de trabajo para atacar políticamente a los ejecutivos centristas. En segundo lugar, el riesgo de avanzar a grandes pasos en este campo, o inclusive mostrarse demasiado equidistantes, podían poner en entredicho las siempre no fáciles relaciones dentro de la familia socialista. Y tercer término, por la propia consonancia social pero también sindical que atraería aparejado el *cambio socialista* durante la segunda mitad del año ochenta y dos.

Tras lo acontecido el 28 de octubre de 1982, junto al repetido *peso de la herencia recibida*, vendrían a sumarse unos márgenes de actuación estrechos de por sí. Estrechos no por cuestiones estrictamente programáticas o ideológicas sino por la propia realidad laboral del país. En todo caso, no debe obviarse algo fundamental, trascendental: a la altura de diciembre de 1982 las posibilidades de actuación seguían siendo amplias. O dicho con otras palabras: se podía caminar en varias direcciones. Especialmente cuando se tiene presente como el capital político y social de los socialistas estaba intacto y con él una enorme potencialidad de cara a desarrollar cualquier política de empleo. Además, en un principio –teórico o si se prefiere político– se mantenía la preferencia por la contratación indefinida en el artículo 15 del E.T. ¿Qué sucedió?

El PSOE llegaría a las elecciones de 1982 con una posición aparentemente unívoca –sin comillas ni cursivas– con respecto a los contratos temporales:

«Los contratos temporales constituirán un recurso excepcional, evitándose que representen para algunos colectivos la única vía posible de acceso al trabajo remunerado»⁴¹⁷.

Decimos *aparentemente*, pues, como veremos a continuación *lo excepcional*, en breve, se transformaría en *lo normal*, por más que no faltarán los juegos de palabras y/o los dobles sentidos en lo escrito *blanco* sobre *negro*, primero, en los textos partidistas y tiempo más tarde en el BOE. La posición mencionada respondía, en suma, al mantenimiento de un criterio político que apenas había registrado “grandes” oscilaciones desde mediados de los setenta, aunque los diversos avatares por los que atravesaría la política de empleo en tiempos de la UCD, le hubieran “obligado” a matizar algunos puntos de partida en un continuo proceso de adaptación a la realidad socio-laboral. Recorrer estos mismos antecedentes –tal y como se realizará a continuación– si bien no resuelve completamente la pregunta central –¿por qué modificaron radicalmente los socialistas su planteamiento programático una vez en el Gobierno?– si nos puede ayudar a comprender el amplio giro político-económico y laboral, a la

⁴¹⁷ PSOE, *Por el cambio...*, *op.cit.*, p. 8. Véase también, AHFFLC, PSOE, Comité Electoral Federal, “Proyecto de programa electoral del PSOE”, Madrid, septiembre de 1982, II vols., sig. AI-139-03, y en concreto el apartado: “6. Relaciones laborales y fortalecimiento de los sindicatos”.

par que nos facilitará explicar la construcción de otro de los “círculos viciosos” a los que enfrentaría, a corto plazo, el Ejecutivo presidido por Felipe González.

Vaya por delante, que las reflexiones tanto sobre la política laboral como en torno a la política de empleo relacionadas con la contratación temporal, serían limitadas hasta el año 1981. En realidad, el principal foco de atención, a nivel programático, en relación al problema de la destrucción de empleo durante todo el periodo en que nos movemos, giraría en torno a otros postulados vinculados con las *recetas* clásicas de la socialdemocracia, aunque eso sí cada vez más imbuidas de un creciente liberalismo en el terreno económico. Es realmente llamativo, por ejemplo, la escasa atención prestada a la evolución de toda la normativa relacionada con la contratación temporal en tiempos de los ejecutivos centristas. O al menos, no se ha podido localizar la documentación pertinente. De hecho, y como veremos, sería la UGT la que marcaría la pauta en este mismo terreno. A partir de donde el propio PSOE iría, posteriormente, moldeando su posición al respecto. Una postura con muy escasas novedades en el terreno tanto político como estrictamente programático.

A grandes rasgos, se puede establecer tres etapas en la definición de una política de empleo –más o menos propia– por parte del PSOE. La primera, iría desde 1976 a 1980/1981, a grandes rasgos, en donde predomina la ambigüedad y la falta de un programa propio en materia laboral. En relación a la segunda se situaría la misma como una etapa de transición que se puede llevar entre marzo de 1980 a octubre de 1981, y en donde se van concretando las bases de una política laboral –antes que de *empleo* propiamente hablando– y en el que asunto de la flexibilidad, igualmente, empieza a introducirse de forma parcial y limitada. Y, finalmente, la tercera fase, se ha de llevar desde noviembre de 1981 a octubre 1982, que es cuando realmente se asiste a la definición de lo que será, en términos generales, la política de empleo socialista. Lo anterior con un añadido: a nivel programático.

Por más que el problema del desempleo ya figurara como uno de los principales problemas en las elecciones del 15 de junio de 1977, el mismo iba a concitar una escasa atención en el programa electoral socialista. Un programa primordialmente enfocado –como, por otro lado, no podía ser de otra manera– a las cuestiones políticas relacionadas con el nuevo periodo que se abría.

Bajo el eslogan electoral “Socialismo es libertad. Vota al PSOE”, eran aún tiempos en donde todavía se podía leer como “[e]l PSOE, en tanto que es un partido de las clases trabajadoras, es un partido que representa unos intereses efectivamente de acuerdo con los programas de transformación social que mantiene”. Allí se defendería la necesidad de avanzar hacia toda una serie de “derechos económicos de la persona como trabajador, el derecho al trabajo, el derecho a las condiciones de seguridad en el trabajo”. Los responsables cuando no culpables de aquella *desastrosa* situación, también aparecían definitivos: “un capitalismo de carácter muy primitivo” o incluso un “capitalismo de rapiña”. No sólo, pues las principales “víctimas de la situación económica son los trabajadores”.

Cuando la crisis económica de mediados de los setenta todavía se catalogaba como *temporal*, se mantendría la *defensa del pleno empleo*. Todo ello en una coyuntura socioeconómica en que *tan sólo* había “alrededor del millón” de parados. Ahora bien, en aquel mismo programa electoral no se podía localizar en sentido estricto un programa de empleo. Ni una sola medida se podía localizar en relación al marco de relaciones laborales. Inclusive las posibles vinculadas con la democratización del propio SERL. Así pues, las propuestas socialistas se limitaban a una “disminución progresiva del impuesto sobre la renta a las empresas”, a la mejora de la “[f]inanciación de la Seguridad Social con cargo a los presupuestos generales del Estado”, al “[a]umento de la inversión pública”, a la “[r]edución de la jornada laboral a cuarenta horas semanales”, la “[r]edución de la edad de jubilación a los setenta” o al “[e]ncarecimiento de las horas extraordinarias, hasta conseguir su eliminación”. La única atención que recibiría la política de empleo, sería el solicitar una “[v]igilancia

acrecentada de las prácticas ilegales de contratación laboral”⁴¹⁸. En suma, medidas típicas de un programa socialdemócrata.

Solamente al calor de los *Pactos de la Moncloa* desde la Secretaria Sindical del PSOE, se empezaría a definir una postura propia al respecto del problema del desempleo. En octubre de 1977, lanzaría un primer informe titulado: “Sobre el paro”. Dirigida entonces la citada *secretaria* por Eduardo López Albizu –líder histórico obrero de la Naval de Sestao– en el mismo documento se concretaría con mayor precisión un análisis sobre las causas del desempleo y sus posibles soluciones económicas antes que laborales. El planteo que allí se presenta vendría a introducir no pocas cuestiones de relevancia. De entrada, que para iniciar el crecimiento del empleo toda política posible tiene que perseguir por objetivo la *reducción del déficit exterior* así como la *reducción del nivel de inflación*. Con más dudas que certezas, en lo que no dejaba de ser un temprano ejercicio de pragmatismo político alejado de posturas ideológicas, se mostraría una honda preocupación por la “reducción del coste real que para la empresa supone el uso del factor trabajo”. Una postura que no podía confundirse “ni [con la] reducción ni modificación del crecimiento de la capacidad adquisitiva de los asalariados”. Significativamente no se entraba a discernir sobre tal cuestión en otra clara muestra de ambigüedad⁴¹⁹.

Otra de las posibles vías de actuación que se entreveían pasaba por racionalizar los costes de la Seguridad Social, e incrementar la financiación vía estatal. Ello sumado a la potenciación de un sector público y la modificación de los mecanismos de distribución de la renta y de la riqueza. Y aquí se afirmaba, como “en la medida de lo posible” se debería evitar que la misma se hiciera a través de la “«lucha salarial»”. El resto de medidas contempladas no irían mucho más allá de lo esbozado en el programa electoral de junio del 1977 (plan de inversiones públicas, política escolar, extensión y control del Seguro de Desempleo, política de formación profesional, alicientes a la jubilación anticipada...). Inclusive se mantendrían las dudas sobre la *efectividad* de la reducción de la jornada de trabajo y las horas extraordinarias, en otro ejemplo de creciente pragmatismo.

En todo caso, es en este mismo documento interno en donde por primera vez se atiende a lo que se denomina los “permisos para contratar temporalmente”. La conclusión a pesar de sus *inconvenientes* era como merecía “ser estudiada”:

«Constituye una propuesta del grupo parlamentario vasco-catalán el permitir realizar contrataciones de trabajadores por un plazo limitado temporalmente. De esta forma se pretendería combatir el efecto negativo provocado por el temor de aumentar las plantillas [de] forma definitiva en un momento de incertidumbre como el actual.

La medida presenta algunos inconvenientes importantes pero merece ser estudiada, especialmente si se tiene en cuenta los condicionantes temporales incluso geográficos que se pueden imponer en su aplicación».

A pesar de estas dudas e incertidumbres –o mejor dicho de la falta de un programa propio de política de empleo– en cambio lo que empezaba a dejarse claro es que la *salidas* a la crisis y, por tanto, a la futura generación del empleo, pasaban por “introducir una mayor racionalidad económica en la globalidad del sistema productivo”. No sólo, pues, también se apostaba por “aumentar la rentabilidad de la inversión y, en medida general, de los planes de expansión del sistema productivo”, a lo que se sumaba como cualquier Reforma Fiscal que se

⁴¹⁸ AHFPI, PSOE, “Programa del PSOE. Elecciones 77”, Madrid, 1977, sig. Fa 282, pp. 2, 4, 10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente.

⁴¹⁹ «Sin embargo, no es desde este punto de vista del que nos ocupamos fundamentalmente en esta nota al tratar de justificar la conveniencia de moderar el crecimiento de los costes totales del empleo de trabajo». AHFFLC, Fondo Saracibar, PSOE, Secretaria Sindical, “Sobre el paro”, Madrid, octubre 1977, sig. 002665-001, p. 20.

acometiera no debería grabar todavía más a las empresas⁴²⁰. Opciones que tendían a casar, pues, con una *salida liberal* antes que *socialdemócrata*.

A la altura de principios de 1979, en concreto de marzo, el primer Gobierno de UCD dirigido por Adolfo Suárez ya había dejado claro su impulso a la flexibilización del marco laboral, a través de la práctica universalización de tal tipo de contratación. También aparecían a todas luces sus primeros resultados: por un lado, una creciente flexibilización de las plantillas, y, por otro lado, su ineficacia para reducir el desempleo. Enfrascado en las tareas propias de la democratización del *Sistema*, los socialistas volverían a presentarse con un Programa Electoral en donde bajo la consigna “un Gobierno firme puede vencer el paro”, remarcarían, en la práctica, todas y cada una de las medidas del programa del setenta y siete. Empero, en aquella ocasión de lo que sí hablarían sería de “[p]lanes específicos para los colectivos de trabajadores marginados, con especial referencia a las mujeres y los jóvenes”. Una nueva indefinición, retóricas políticas aparte, que mostraba, una vez más, la falta de una política de empleo propia, en unas circunstancias electorales en donde la *opción socialista* partiría como una firme candidata a gobernar⁴²¹.

Inclusive en tiempos de la negociación y posterior acuerdo sobre el ET, desde la organización socialista así como desde UGT, se guardaría un *riguroso silencio* sobre la ampliación de la contratación laboral. Un silencio que se puede rastrear en las publicaciones al respecto. Bajo el argumento de “Una base para avanzar” el PSOE había terminado aceptando, en su totalidad, el Estatuto de los Trabajadores en marzo de 1980.

Lo cierto, es que las discusiones tanto durante la elaboración del proyecto como en su paso por el Parlamento, constituiría uno de los debates más vivos y polémicos de aquella I Legislatura. Un debate marcado, en gran medida, tanto por las numerosas enmiendas del Grupo Socialista –más de 400 en total– como por el fuerte cruce de acusaciones contra el Grupo Parlamentario Comunista⁴²².

A pesar de que a la hora de las consabidas conmemoraciones y de los diversos homenajes, a los entonces dirigentes socialistas no les faltaría tiempo para sumarse a los

⁴²⁰ AHFFLC, Fondo Saracibar, PSOE, Secretaría Sindical, “Sobre el paro”, Madrid, octubre 1977, sig. 002665-001.

⁴²¹ AHFPI, PSOE, “Programa elecciones 79”, Madrid, marzo 1989, sig. Fa 301, pp. 3-4.

⁴²² En uno de los documentos publicados por la propia organización socialista, junto con la UGT se volvería a insistir, como en anteriores ocasiones, a la acusación acerca de la colaboración entre la UCD y el PCE, de cara a un supuesto reforzamiento sindical de CCOO. Lo cierto, en este caso es que los sindicalistas y parlamentarios de la UGT se emplearían, de forma casi permanente, estos mismo argumentos en este y otros debates parlamentarios, e inclusive de justificación para terminar apoyando el ET. Así por ejemplo se señalaría, entre otras muchas cuestiones, la siguiente: «Podríamos añadir un tercer factor que afecta directamente a nuestra central sindical: la política del Gobierno durante los dos últimos años, especialmente hasta las segundas elecciones legislativas, dirigidas a debilitar específicamente la UGT como base sindical del PSOE. En este sentido conviene recordar el descarado apoyo del Gobierno a CCOO en las pasadas elecciones sindicales y los intentos de UCD de potenciar una tercera fuerza sindical que compitiera dentro del espacio sindical propio de la UGT». AHFPI, UGT, “Ante el Estatuto del Trabajador”, Madrid, 1981, sig. Fa 3936, p. 5. No obstante sobre el cambio de posición del NO rotundo al SI de la UGT, tras las negociaciones sobre el ET, compárense los siguientes documentos, ya que aportan interesantes reflexiones de cara a la metamorfosis de la actitud del sindicato socialista una vez que el PSOE llegaría al Gobierno. AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Acción reivindicativa, “Por el Estatuto de los Trabajadores, la revisión salarial y la devolución del patrimonio sindical”, Madrid, a 3 de julio de 1979, sig. 001817-002; AHFFLC, UGT-CEC, “Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1980, sig. 002284-005. De hecho, en este último documento es donde encontramos la única referencia en la defensa del mantenimiento del principio de estabilidad: «Es absolutamente falso que este Estatuto consagre el despido libre, tal y como vienen diciendo machaconamente algunos, de forma insensata, en los últimos días. Por ahí no íbamos a pasar, bajo ningún concepto, los socialistas. Lo que hace realmente este Estatuto es acentuar el principio de estabilidad en el puesto de trabajo, que es exactamente lo contrario, pues detalla minuciosamente los motivos del despido» (p. 5).

misimos, la posición socialista pasaría de una inicial como radical oposición a un voto *favorable crítico* final. Eso sí con una notable falta de entusiasmo como sucedería en otros tantos casos, para no ver dañada su consabida estrategia de *corresponsabilidad* con la nación. Inclusive entonces tampoco faltaría el relato mistificado para justificar aquella decisión: “Los socialistas, partido mayoritario de la clase trabajadora, volcamos toda nuestra fuerza, desde el primer momento, para hacer del Estatuto una ley favorable”.

Prestos a evitar posibles acusaciones, no dejarían de aportar la correspondiente lectura acerca de las considerables ventajas para el conjunto de la clase obrera, que ofrecería, a no más tardar, la Ley 8/1980:

«El Estatuto fortalece al conjunto de los trabajadores, porque les da medios para avanzar, desde lo ya conseguido, hacía nuevas mejoras en sus condiciones de trabajo, y favorece a los sectores más explotados, porque les garantiza unas condiciones mínimas que de otra forma no habrían logrado».

En lo que no dejaba de ser un muy difícil equilibrio político –a la par que discursivo– se remarcaba como el “Estatuto no es un punto de llegada, sino una base de partida. Tras su aprobación, los trabajadores son más fuertes que antes, y pueden continuar su lucha en mejores condiciones”. Asimismo se felicitarían por haber evitado el “despido libre” y eliminar “la pretensión de la patronal de institucionalizar la flexibilidad de plantillas”. He aquí, por cierto, la única referencia al asunto que nos trae en estas líneas⁴²³. Una posición, no obstante, debatible.

Predominaría, pues, una posición política sobre la social y jurídica. De hecho, en los materiales que desde la organización socialista se publicaría, en realidad, se haría bastante más hincapié en sus enfrentamientos con los comunistas, que en temas menos sustanciosos como la redacción del artículo 15 o el artículo 17.3. Todo por y a través de una prolongación discursiva del anticomunismo militante del socialismo español, quien cargaría las limitaciones del ET en la figura de Marcelino Camacho y por extensión del PCE y de CCOO⁴²⁴.

Superado el no fácil *trago* del ET que, en todo caso, sería más llevadero por las “conquistas parciales” pactadas en el AMI entre UGT y CEOE en relación a los “delegados sindicales”; se abre una breve pero intensa etapa de clarificación en el proceso de elaboración de su *política de empleo* que encontraría su fiel reflejo en el programa electoral de *Por el Cambio*. Nos encontramos, pues, en la fase de transición, entre la primera a la segunda etapa establecidas de forma previa.

Ciertamente no resulta sencillo reconstruir esta etapa de transición, que se puede situar entre marzo de 1980 a octubre de 1981. Los escasos documentos disponibles hasta el momento tan sólo aportan ideas generales sin mayores precisiones. Tampoco ayuda mucho, en esta ocasión, detenerse en las declaraciones a prensa o en otro tipo de documentos no directamente relacionados, en tanto pareciera no existir una posición clara y definida. O cuando menos no se quiso públicamente ir más allá de ideas generalistas. Una vaguedad que conecta con todo lo dicho en capítulos anteriores: nos encontramos, en suma, con la calcula ambigüedad programática de los socialistas en su recta final de acceso al poder.

Una ambigüedad que también compartía, en cierta parte, la propia UGT a nivel programático. Más allá de su continuada oposición a la política de flexibilización de los ejecutivos presididos por Suárez así como de su radical posición contra el despido libre, carecía a mediados de los ochenta de un programa propio, a diferencia de su principal competidora

⁴²³ AHFPI, PSOE, Secretaria Federal de Prensa y Propaganda, Secretaria Federal de Política Sindical, “El Estatuto de los Trabajadores. Una base para avanzar”, Madrid, 1980, sig. Fa 1420, pp. 5,6, 7 y 9, respectivamente.

⁴²⁴ Al poco tiempo de publicarse en el BOE la Ley 8/1980, de forma conjunta el PSOE y UGT publicarían un amplio dossier informativo dirigido a la militancia y cuadros: AHFPI, PSOE-UGT, “Carpeta documentación Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1980, sig. Fc 397. Allí se transcribirían parte de las intervenciones de Redondo y del propio Felipe González, en donde sobresalían las críticas al PCE y a CCOO.

sindical. A subsanar esta importante deficiencia vendría la elaboración de un largo documento titulado: “Crisis económica y lucha contra el paro: una estrategia a medio plazo”. En el mismo, y en primer lugar, se advertía como se trata [...] de una crisis estructural y profunda”. Una *modificación* del ángulo de análisis de no poca relevancia. Advertido el peligro de que si no se atajaba “con urgencia” el problema del desempleo”, el mismo “hará peligrar sin duda la propia consolidación del proceso democrático”, se definían las líneas de un nuevo “programa de lucha contra el paro”. Se renunciaría allí a la simple “adaptación de posiciones defensivas, tales como la política de reparto del trabajo o la subvención directa a la creación de nuevos empleos”. Tocaba repensar una “estrategia global”.

En el apartado dedicado a “Medidas de lucha contra el paro a corto plazo”, se volvían a esbozar las *recetas* consabidas. Ahora bien, en relación al establecimiento de una “estrategia a cuatro o cinco años vista”, entre las cuatro medidas contempladas, se hablaba ya, sin ambigüedades, de aquellas “dirigidas a flexibilizar la contratación de nuevos trabajadores”. Se advertía, de entrada, como “[n]o es nuestro criterio mantener posturas inflexibles acerca de las modalidades de contratación laboral”. Y partir de ahí se daba un paso de calado de cara a superar las reticencias empresariales de contratar:

«Admitir un cierto grado de flexibilidad en la contratación laboral, no implica sin embargo la aceptación de una total liberalización de los modos de contratación, lo que llevaría a la práctica desaparición de los contratos a jornada completa y por tiempo indefinido y una mayor segmentación del mercado de trabajo».

Y como había sucedido, previamente, la mayor de las atenciones recaería sobre la figura de la contratación a tiempo parcial, cuando esta ni siquiera se había desarrollado legislativamente. Pero lo más interesante de aquel mismo documento vendría a la hora de detallar en qué condiciones y en qué circunstancias se podría utilizar la contratación temporal. Se establecían allí toda una serie de requisitos sobre su uso pero también de precauciones que, en poco tiempo, tendrían una similar traslación a la política de empleo del PSOE:

«El contrato de duración determinada, por su parte, debe sujetarse estrictamente a los requisitos fijados por el Estatuto de los Trabajadores, ya que su utilización abusiva en programas de fomento directo del empleo, sin control sindical sobre su definición y realización, lleva a sustituciones fraudulentas de empleos estables por empleos a tiempo cierto en algunas empresas a una segmentación del mercado de trabajo, impidiendo que toda una serie de colectivos de trabajadores tengan posibilidades de acceder a un puesto de trabajo fijo»⁴²⁵.

Quedaba así definido, a grandes rasgos y sin mayores precisiones, una inicial apertura hacia la contratación temporal en tiempos de crisis que, en cualquier caso, deberían ser acompañadas de otras tantas medidas. Se abría así una posible vía de actuación que más pronto que tarde se reforzaría a través de no pocos argumentos *ex novo*, pero sobre a través de la práctica, casi cotidiana, de negociar y pacta con las diferentes administraciones.

Es en este preciso contexto, cuando desde el PSOE se realizarían parciales intentos definir una política de empleo, una vez aprobado el ET. Entre otros trabajos en esta dirección, desde la Secretaría de Acción Sindical del PSOE –entonces ya bajo la dirección de Joaquín Almunia– se elaboraría un pequeño informe sobre la política laboral, en el que se trataría de dejar sentados los principios generales de una política socialista al respecto. Evaluadas como negativas las múltiples medidas aprobadas por los gobiernos centristas en la construcción tanto de un modelo de contratación como a su vez de democratización del SERL, se cuestionaría la “fórmula neoliberal” adoptada. Pero lo más interesante del mismo es la crítica –la primera en este sentido que, al menos, conozcamos– al Título I del ET que, a su juicio, habría venido a introducir “elementos regresivos en el ámbito de las relaciones individuales, tanto en lo técnico, como en lo político”. No sólo, pues, el mismo “ha perpetrado discriminaciones injustificadas en sectores laborales difícilmente justificables ante la Constitución”. También se discutiría los

⁴²⁵ AHFFLC, UGT, “Crisis económica y lucha contra el paro: una estrategia a medio plazo”, Madrid, 1980?, sig. 002288-003, pp. 1, 3,4, 5, 15, 16, 29, 30 y 31, respectivamente.

porqués del retraso de su propio desarrollo. La conclusión aparecía como evidente: el gobierno carecía de un modelo laboral propio.

Pero, una vez más, la indefinición sería la nota dominante cuando se hablaba de los *principios básicos de una política laboral del PSOE*. Aunque se matizarían aspectos de honda importancia, como el papel a jugar por los *interlocutores sociales* en la definición del campo de la “autonomía colectiva”, se hablaba, a lo sumo, de un “replanteamiento global de los mecanismos institucionales de la Política de Empleo”. Pocas otras pistas se podían intuir en este mismo sentido. Tampoco en aquella ocasión se mostraría posición alguna con respecto a la contratación temporal. Así se podía leer como se apostaba por un “[d]esarrollo reglamentario, urgente, con carácter progresivo”, y de la necesidad de “poner en práctica [...] medidas innovadoras o de supuesto apoyo al Empleo (trabajo a tiempo parcial, contratos para la formación, en prácticas)”⁴²⁶.

Lo anterior, se reproduciría, en cierta medida, en otro de los documentos más importantes a nivel político-económico que el PSOE publicaría en aquellas citadas fechas: “Estrategia económica del PSOE”, del que se ha hablado en otros capítulos⁴²⁷. Remarcados los problemas de la elevación del paro, de la falta de un SERL democrático o la evolución salarial; en el apartado “4. Una prioridad irrenunciable: el empleo”, tras resaltar el problema del *boom* demográfico, se exponían las medidas tantas veces contempladas, y centradas, en lo fundamental, en el reparto del trabajo disponible⁴²⁸.

Pese a todo lo dicho algo se empezaba a mover, aunque fuera dentro estos mínimos márgenes de actuación descritos. De esta forma, y sin salirnos del año ochenta, de nuevo PSOE y UGT publicarían un documento conjunto. En esta ocasión, el mismo estaría dedicado a la política de empleo juvenil. Un paso no menor. El joven, los jóvenes, en singular o en plural, siempre habían ocupado un espacio destacado dentro del discurso político del socialismo español por cuestiones económicas y, claro está, por cuestiones estrictamente políticas. Pero, lo cierto, es que hasta entonces no se había dedicado tanta atención al asunto desde otras perspectivas.

Cuando todavía resonaban los duros debates que habían acompañado a la negociación y tramitación parlamentaria del ET, el conjunto del socialismo español pasaba revista a una signatura pendiente: “En España, los jóvenes menores de 25 años, suponen el 59% de la población total en desempleo, y pese a un cierto progreso a nivel político y económico, la situación sigue siendo crítica”. No es que aquello supusiera en modo alguno cualquier tipo de *revelación*, pero que el principal partido de la oposición comenzará a tomarse en serio el asunto, sí tenía su trascendencia. Especialmente, cuando se abordaba de forma global y desde una posición progresista e inclusive de izquierdas el asunto, y se evitaba la tradicional caracterización de la juventud como un problema social. Un detalle no menor, sobre todo si se observa el asunto a medio plazo, y se cae en la cuenta que sería el propio PSOE quien redactaría, en su día, el programa base que daría origen al PEJ. Todo ello en menos de ocho años⁴²⁹.

Volviendo ahora al documento, los datos y las propias realidades que describían no dejaban mucho margen para las dudas o las dobles interpretaciones: la situación del desempleo juvenil era, sencillamente “dramática”. Los jóvenes se hallaban en un permanente círculo

⁴²⁶ AHFFLC, PSOE, Secretaria de Acción Sindical, “Política laboral. I Principios generales”, Madrid, 1980?, sig. 002286-002. Autor: Joaquín Almunia.

⁴²⁷ Nos remitimos, en primer lugar, a lo ya apuntado en el Capítulo 4, *nota 317*, *nota 438* y *nota 439*.

⁴²⁸ AHFPI, PSOE, “Estrategia económica del PSOE”, Madrid, 1980?, sig. Fa 1411.

⁴²⁹ Nos remitimos aquí al apartado “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el *único camino posible* de la economía política socialista?”.

vicioso: difícil entrada, fácil salida. Una situación en la que, buena parte de la responsabilidad las tenían las diferentes medidas de “fomento del empleo juvenil” adoptada desde el RD-L 43/1977, que habían conllevado “escasos resultados positivos”. Poco o nada, no obstante, se advertía sobre su dirección y contenido. Hasta ahí llegaba cualquier crítica posible relacionada con la política laboral centrista⁴³⁰. Así se limitaba a exponer los puntos centrales de la entonces denominada “Ley Socialista contra el Paro” que repetía, uno por uno, todos y cada uno de los puntos expuestos en tantas ocasiones. Pareciera, en verdad, que pese a los datos y más datos expuestos, ni la temporalidad ni la flexibilidad fueran no ya motivo de preocupación sino de reflexión para los socialistas.

En el citado documento, por lo demás, se volverían a presentar las mismas medidas tanto a *corto plazo* como a *medio plazo*. Y ello con no pocas dudas sobre cómo y de qué forma orientar la acción socialista –tanto política como sindical– en aquel marco de relaciones todavía en construcción⁴³¹. Quizás se acentuaría el tono dramático, al advertir de un posible “colapso” del sistema y afirmar con fundado realismo de que “el pleno empleo no es, hoy por hoy, alcanzable a corto plazo”. Matizado lo anterior, tampoco se ensayarían propuestas novedosas o rupturistas. Ni siquiera a la hora de diferenciarse en el terreno político, más allá exigir una mayor protección sindical y una mayor protección al desempleado. Inclusive cuando se hablaría de formación profesional, no se exponía nada nuevo que no se estuviera ensayado, más allá de destacar, de nuevo, la presencia de participación sindical o de acompañar a la misma con “formación cultural”. Tampoco se hablaría de cómo desarrollar los posibles contratos de formación y en prácticas o sus propuestas frente a la política de fomento de empleo para colectivos especiales contemplados en el artículo 17 del ET. La pobreza de la política de empleo socialista quedaba otra vez evidenciada⁴³². O dicho de otra forma: en ningún caso se podía hablar de una *alternativa socialista* en materia de política de desempleo juvenil.

Tampoco se definiría una política de empleo propia en el XXIX Congreso del PSOE, celebrado en octubre de 1981, pese a ser el espacio, en principio, más adecuado para tales empresas. En una parte concreta del *Informe de Gestión* presentado por la Secretaría de Acción Sindical, tras valorar positivamente el Estatuto de los Trabajadores –lo que entraba en contradicción con otro tipo de opiniones más recientes acabamos de ver– y volver a la carga con la defensa del AMI, el apoyo al ANE y la posición contraria al LBE, se afirmaría al respecto de la política laboral de UCD:

⁴³⁰ En otra parte de aquel largo documento tras repasar por segunda vez en no pocas páginas las mismas normativas se llegaría afirmar: «Los jóvenes hoy siguen acudiendo a las oficinas de empleo, sin ninguna esperanza de encontrar trabajo, los escasos puestos de trabajo que se crean no están al alcance, porque para la mayoría de ellos se precisa ‘experiencia’. Los jóvenes que dejan la escuela sin formación adecuada, no pueden competir por los otros empleos. Otros, que tienen posibilidades de trabajar, muchas veces no les dan de alta en la Seguridad Social, mantienen con ellos contratos de aprendizaje interminables, les hacen hacer los trabajos más indecorosos y suelen pagarles por debajo del salario mínimo interprofesional, bajo la amenaza continua de despido». Una descripción de la realidad que, como tiempo tendremos de ver, no se modificaría sustancialmente, durante la época socialista. AHFPI, PSOE y UGT, “Política de empleo juvenil. Carpeta de Documentación”, Madrid, Secretaría Federal de Política Sindical del PSOE / Secretaría Federal de Relaciones con la Juventud / Departamento de la Juventud de UGT, 1980, sig. Fc 396, p. 19.

⁴³¹ Léase con atención el siguiente párrafo: «La crisis económica dificulta la consecución de nuestras reivindicaciones en este terreno, al reducir el margen de negociación de las empresas, con el consiguiente endurecimiento de sus posturas, pero al mismo tiempo refuerza el carácter prioritario de la defensa del nivel de empleo, lo cual supone en cierto modo una opción en detrimento de otras opciones posibles». AHFPI, PSOE y UGT, “Política de empleo juvenil. Carpeta de Documentación”, Madrid, Secretaría Federal de Política Sindical del PSOE / Secretaría Federal de Relaciones con la Juventud / Departamento de la Juventud de UGT, 1980, sig. Fc 396, p. 16.

⁴³² AHFPI, PSOE y UGT, “Política de empleo juvenil. Carpeta de Documentación”, Madrid, Secretaría Federal de Política Sindical del PSOE / Secretaría Federal de Relaciones con la Juventud / Departamento de la Juventud de UGT, 1980, sig. Fc 396, pp. 1, 3, 4, 5, 11, 10, 16 y respectivamente.

«Completando la acción emprendida por UGT, la Secretaria Sindical se esforzó en dar a conocer las alternativas socialistas respecto de la política de fomento del empleo y la cobertura de los desempleados, que chocaron con las posturas insolidarias y regresivas del Gobierno y su partido».

Hasta el momento, y a excepción de que ocurriría en junio de 1982, no se conoce mayores movilizaciones ni documentación al respecto⁴³³. Pero dejando aparte este *detalle* “no” *menor* tan típico de la narrativa socialista, resultarían decepcionantes –desde esta perspectiva acá empleada– los resultados de ese mismo 31º Congreso en relación al texto congresual sobre “Política Socio-económica, Sindicalismo y cooperativismo”. No sólo es que se resolviera el asunto en unos pocos párrafos, tras defender a nivel sindical la estrategia seguida hasta entonces por UGT, sino que, en la práctica, poco se avanzó. Y eso que el documento prometía, al abrir tal apartado y hablar de los “aspectos concretos de política de empleos dirigidos a flexibilizar el mercado de trabajo y a planificar en el medio plazo la oferta del mismo”. Ni una sola palabra se diría sobre la contratación temporal, tras desarrollar sus propias posiciones con respecto al contrato a tiempo parcial, el contrato en prácticas e indicar literalmente lo siguiente: “[a]mparar el empleo de aquellos grupos marginales con mayores dificultades de acceso a los puestos de trabajo”⁴³⁴.

Tan sólo va a ser con la perspectiva de ir preparando las elecciones generales, cuando se decida desarrollar una política de empleo con mayor decisión y precisión. Nos situamos, en noviembre de 1981. Fecha en donde se puede abrir la tercera etapa antes mencionada. Todo ello en una coyuntura, en donde la dirección de la organización se verá obligada a dotarse de un programa o unas líneas definitorias que superen la ambigüedad y/o el vacío que habían predominado hasta entonces. No obstante, tampoco se producirá, a partir de aquí, una ruptura con el reciente pasado, así como las potenciales novedades serán bastante limitadas tanto en el terreno político como jurídico.

De este modo, y una vez puesta en marcha la maquinaria electoral del PSOE, se constituirían varias comisiones de trabajo entre las que se encontraría Comisión sobre Política de Empleo. A la postre la gran protagonista del programa electoral. Una primera y elaborada propuesta sobre el mercado de trabajo, y más concretamente acerca de la política laboral, la podemos localizar en un *informe confidencial* titulado, “Un objetivo prioritario: El empleo”, a cargo de la Secretaria de Estudios y Programas de la CEF del PSOE, fechado en febrero de 1982⁴³⁵. He aquí el primer gran boceto de la futura política de empleo sobre que se sustentaría el futuro Gobierno socialista.

En la primera parte del citado *informe confidencial* se presentaba un riguroso y completo estudio –como no se había realizado en ningún caso anterior– en torno a la dimensión alcanzada por el problema del desempleo. Incidiendo en dos ideas básicas: primero, a corto y medio plazo, se preveía un agravamiento sustancial de la propia evolución del mercado de trabajo; y segundo, se esbozaría, por vez primera, un análisis en profundidad de los problemas de acceso e inserción de la nueva generación de jóvenes trabajadores. Así se plantearía como en el “próximo cuatrienio 575 mil activos entrarán cada año en el mercado de trabajo”, entre jóvenes y mujeres. Lo que conllevaba a un calculado razonamiento de tipo económico-laboral: “Todo lo anterior supone que sería necesario aumentar anualmente en 125 mil los empleos disponibles para dar empleo a toda esa población en demanda del mismo”. Sumado a otra dosis

⁴³³ AHFPI, PSOE-CE, “Memoria. Informe de Gestión. 29º Congreso”, Madrid, 1981, sig. Fc 246, pp. 255.

⁴³⁴ AHFPI, PSOE, “Anexo del acta del 29º Congreso. Política Socio-económica. Sindicalismo y cooperativismo”, Madrid, 1981, sig. Fa 1306, pp. 12-13.

⁴³⁵ PSOE-CEC, Secretaria de Estudios y Programas, “Un objetivo prioritario: El empleo”, Madrid, 1982. Dicha documentación la hemos podido localizar en AHFFLC, sig. 002275-001, PSOE-CEF, Secretaria de Estudios y Programas, “Correspondencia con partidos políticos, en carta de Álvaro Espina y Joaquín Almunia a UGT sobre el futuro Programa del PSOE, en lo referente a la Política de Empleo”, Madrid, 22 de febrero de 1982.

de realismo: “pero hacer crecer el empleo a una tasa anual del 2,5 por ciento aparece actualmente como un objetivo punto menos que utópico”. Datos a tener muy presente, sobre todo para entender las formas y costes políticos de la introducción a *última hora* en el Programa Electoral de 1982 de la propuesta de los 800.000 empleos⁴³⁶.

Se ha advertido en numerosas ocasiones que en tal campo los socialistas no aportaron un programa novedoso. O si se prefiere alternativo y/o diferenciador. Todavía se puede ir un paso más allá: el citado documento constituye la *avanzadilla* de la introducción de postulados liberales analíticos sobre el modelo de relaciones laborales de no poco alcance, y ello a través de un lenguaje político-económico muy alejado de la socialdemocracia clásica. Por ejemplo, queda ya claro como la principal –aunque todavía no se había transformado en la *única*– vía de salida a la crisis económica pasaba por incrementar la inversión –*privada* se supone, aunque no se especificara en su día–. Con todo se guardarían aún las formas. Así se hablaba de cómo las “políticas expansivas son imprescindibles”; o de cómo la propia mejora de la inversión” tendría que “permitir la productividad y ésta elevar el nivel de vida y la competitividad, ya que sin esta última el crecimiento resultaría a la largo obstaculizado por el déficit exterior”.

Sin embargo, en un cada más evidente desequilibrio político-económico en términos programáticos, por ejemplo, se hablaría de *despejar incertidumbres* –empresariales, se sobreentendía– o evitar “conflictos innecesarios” en relación a la conflictividad laboral. Aspectos que todavía quedarían mejor reflejados cuando se pasaba revista a los tres puntos centrales sobre los que se sustentaría un “crecimiento orientado a la creación de empleos”. En materia de política de precios, primero, se renunciaba a una política intervencionista, y ni siquiera se cuestionaría fijar el IPC por la inflación prevista, a pesar de constituir uno de los grandes logros de la derecha económica tras los Pactos de la Moncloa. En lo referente a la política de costes salariales, se hablaría de cómo el ejemplo debe ser el AMI, con la coletilla de que los “grandes acuerdos salariales anuales deben garantizar la conservación del poder adquisitivo de los salarios”. Téngase presente la pérdida de poder adquisitivo que conllevaría el citado acuerdo firmado entre la UGT y la CEOE. Retocado lo anterior con alguna leve crítica al comportamiento empresarial –en un tono, eso sí, siempre políticamente correcto– en el tercer pilar planteado, acerca de la política monetaria y las rentas de capital, se presentaría un esquema que muy pronto se vendría abajo: “Debe abandonarse por tanto definitivamente la obsesión por el control de la cantidad de dinero, que ha prevalecido hasta época muy reciente, y centrar la atención en la evolución de los tipos de interés como variable de control”.

Aquel “sustancioso” *informe confidencial* continuaba con un apartado que bajo el rótulo “Una política para crear empleo”, centraría la mayor de sus atenciones en “relanzar la inversión”, y aquí sí se hablaba de “tanto la pública como privada”, y para tal empresa, se avisaba como la misma “exige eliminar barretas y rigideces que se oponen a ella”. Las líneas maestras del futuro proyecto de modernización socialista empezaban a verse con claridad.

Detallado lo anterior, en la segunda parte de *Un objetivo prioritario: el empleo* por primera vez, se formularía, con todas sus consecuencias, una posición clara con respecto a la flexibilización del ordenamiento jurídico-laboral. El documento se centraría en la crítica sobre el recurrido argumento de la *necesidad y/o falta de adaptabilidad del mercado de trabajo*, planteado como justificación/pretexto a la hora de introducir las *cuñas flexibilizadoras* por parte de los gobiernos de UCD. Una crítica un tanto singular no tanto por su posterior incorporación al discurso político socialista, sino por el maniqueísmo que presenta:

«La falta de adaptabilidad del mercado de trabajo a las nuevas necesidades de la empresa es otro de los motivos reiteradamente aducidos para explicar la escasez de nuevas contrataciones. En la mayoría de las ocasiones estos argumentos son de carácter ideológico y persiguen tan sólo aprovechar la situación de crisis económica para mejorar globalmente las posiciones de la parte empresarial y lograr un mayor dominio sobre el mercado. Consecuentemente con ello la posición socialista es nítida y se sitúa al lado de los trabajadores

⁴³⁶ Véanse, entre otras referencias, Capítulo 4, *nota* 471.

en la defensa de sus reivindicaciones legítimas, siempre que resulten compatibles con los intereses generales de la colectividad»⁴³⁷.

Ya en el terreno de las *propuestas* cuando se procede a profundizar en las mismas, no se encuentran posiciones tan radicalmente enfrentadas entre una opción política u otra, fuera progresista o conservadora. Todavía más, pues el supuesto matiz “progresista” de los socialistas, que tan bien le vendría a la hora de diferenciarse en el plano discursivo/programático de la derecha política, y que se concretaba en una “aparente” mayor defensa de la preferencia por la contratación indefinida, estaba redactado de tal forma que lecturas discordantes podían realizarse al mismo tiempo:

«En particular consideramos que una sociedad como la nuestra no puede renunciar a la conquista que supuso en toda Europa durante la posguerra la consideración legal de los contratos ordinarios de trabajo, salvo en supuestos especiales, como contratos de duración definida, que requieren procedimientos reglados de terminación»⁴³⁸.

Dada entonces una singular correlación de fuerzas capital-trabajo, ningún partido político –de izquierda a derecha y de derecha a izquierda– cuestionaba entonces frontalmente el principio de estabilidad en el trabajo como meta final. Ni menos, el principio de causalidad. Todavía, el derecho del trabajo y los *iuslaboralistas* mucho tenían que decir. Y, a partir de ahí, lo que se puede observar es una apuesta gradual por la flexibilización del SERL. Así pues, se modificaba la concepción de los argumentos e ideas pero no el fin mismo. Así se hablaba de la *necesidad* de introducir *medidas correctoras*, aludiendo también a los problemas de *adaptabilidad*. Eso sí con otro matiz que pronto se hará común: la también *necesidad* de adaptación a la normativa comunitaria europea, que a su vez serviría para salir de no pocos *atolladeros* negociadores. Un planteamiento, por cierto, muy del gusto de la CEOE⁴³⁹. En esta suma de aparentes contradicciones, de hecho, se dejaban abiertas las puertas a la introducción de nuevas *medidas correctoras*. Aunque se remarcaría como, en ningún caso las mismas producirían *variaciones sustanciales* de las relaciones capital-trabajo en un no sencillo encaje dialectico. D de puertas para adentro se incidía como en caso de una mayor flexibilidad, se haría “preservando los derechos y aspiraciones de los trabajadores y fomentando su capacitación”.

Denunciada la errática como cortoplacista política de los diferentes gobiernos de UCD, a su vez se anunciaba como no se tenía por objetivo “producir variaciones sustanciales en los tres tipos de contratos disponibles: Ordinario, por modalidades y por planes especiales”. Otro “aviso” de los límites reales del *cambio socialista*. Así pues, más que otra *política posible de empleo*, se preconizaría toda una serie de “cambios y mejoras” en aspectos concretos. Previsibles cambios que se limitaban en el caso de los mal llamados “supuestos Especiales” – para referirse, ni más ni menos, que los de *obra* o *servicio*, *eventuales*, de *interinidad* o los *fijos*

⁴³⁷ AHFFLC, PSOE-CEF, Secretaría de Estudios y Programas, “Un objetivo prioritario: El empleo”, Madrid, 1982, sig. 002275-001, pp. 13-14.

⁴³⁸ El documento venía a señalar: «En particular consideramos que una sociedad como la nuestra no puede renunciar a la conquista que supuso en toda Europa durante la posguerra la consideración legal de los contratos ordinarios de trabajo, salvo en supuestos especiales, como contratos de duración indefinida, que requieren procedimientos reglados de terminación». AHFFLC, PSOE-CEF, Secretaría de Estudios y Programas, “Un objetivo prioritario: El empleo”, Madrid, 1982, sig. 002275-001, p. 14.

⁴³⁹ Este argumento sería repetido, de forma constante, a lo largo de los gobiernos socialistas. Todo ello a través de una construcción discursiva un tanto maniquea y/o simplista al limitarse a identificar Europa con flexibilidad y España con rigidez: «Para aprovechar mejor las oportunidades que se ofrecen a la economía en el proceso de adaptación a la CEE, debemos favorecer los cambios que lleven a su funcionamiento con mayor agilidad. Siendo nuestro principal objetivo la generación de empleo, consideramos que deben revisarse los impedimentos, derivados de las rigideces en la asignación de puestos de trabajo, en la movilidad o los debidos a formulas rígidas de contratación que puedan dañar a los trabajadores en paro». AHFFLC, PSOE-CEF, “Proyecto de ponencia marco. XXXI Congreso”, Madrid, 14 de septiembre de 1987, sig. AI-138-02, p. 55. Véase aquí también lo apuntado en su momento en el Capítulo 7, *nota* 454.

discontinuos— a asegurar un mayor control sindical y a evitar los fraudes. Ni antes ni ahora se cuestionaría su funcionalidad y naturaleza en una clara aceptación de las dinámicas reales del mercado de trabajo español. Es más se apuntaba como de cara a incrementar su utilización se “establecerán incentivos para aquellas empresas que los transformen en contratos ordinarios”. Nada nuevo, que no se hubiera intentando previamente.

Más allá de que se siguiera mirando con desmedido entusiasmo las posibilidades que ofrecería una nueva y posible regulación de la contratación a tiempo parcial; en relación a los contratos en prácticas y para la formación, el primer objetivo, pasaba por evitar su uso fraudulento, dirigido a “conseguir una mano de obra joven, a niveles mínimos de salario, con subvención de cuotas a la Seguridad Social y en régimen de contratos temporales a tiempo parcial, sin respetar la finalidad para la que se crearon”. Y cuando, por fin, parecía que el PSOE iba a definir una política de empleo juvenil propia, de nuevo, se limitaba a las medidas, o bien, ensayadas, o bien ya planteadas y publicadas en el BOE. Subvenciones, prohibiciones o establecimiento de porcentajes de plantillas por empresas, constituían los consabidos argumentos. Al menos, en aquella citada ocasión, también se delinearían los principios de un posible programa de formación profesional, que establecía algunos posibles caminos para la *inserción* dentro del mercado laboral. Otra de las asignaturas pendientes en donde tampoco se podía localizar mayores novedades.

Por lo demás, en lo referente a la contratación temporal se establecía la clásica distinción entre la contratación temporal de tipo “general” establecida en el artículo 15 del ET y la contratación temporal como medida de fomento del empleo en relación al propio artículo 17.3 del ET. Se señalaría, asimismo, que la anterior formula de contrato podía ser considerada como válida tan sólo como “medida coyuntural y excepcional” en tanto persistiera la citada crisis económica. Sin duda la *sombra ugetista* estaba más que presente en esas mismas palabras—. Una figura, en todo caso, a la que se seguía observando con recelos, pero ya menos que en otras ocasiones.

En resumen, la más utilizada figura para contratar en aquel momento, aparecía así como otro de esas necesarias cesiones dadas las circunstancias y la coyuntura de España a principios de los años ochenta. El reto —en el plano siempre programático antes que en el teórico— pasaba por defender, cuando menos de puertas para adentro, una cerrada concepción garantista —se supone que de cara a evitar su universalización definitiva, especialmente tras lo que sucedería con el ANE y su posterior *pack legislativo* “ad hoc”— aunque sin renunciar a otras vías de flexibilización. Todo ello con una característica ya habitual: la falta de concreción, tanto sobre duración, características, trabajadores potenciales implicados... y un sinfín de cuestiones. En todo caso, a partir del citado documento ya se tenía una idea meridiana de las opciones socialistas en materia de política laboral:

«Los contratos temporales como medida de fomento del empleo constituyen una medida de carácter temporal y excepcional: en ningún caso pueden alentarse expectativas de vigencia indefinida de las disposiciones que los regulan. En circunstancias normales es el contrato eventual del Estatuto de los Trabajadores el que será aplicable en los casos previstos. Pero mientras que no se produzca una cierta recuperación del empleo estos contratos temporales pretenden evitar cualquier desfase entre la reactivación económica y la del empleo. A tal efecto su utilización se vinculará a la creación neta de empleo y no podrán usarse por empresas que hayan acudido a la regulación de empleo meses anteriores. Las empresas no podrán disminuir plantillas mientras que hagan uso de tales contratos, cuya proporción sobre el total de la plantilla no superará la escala establecida según tamaño de empresa. Estos contratos no contarán con bonificación de ningún tipo, reservándose esta para los casos en que las empresas decidan transformarlo en indefinidos. La negociación colectiva debiera tratar también este aspecto de las transformaciones. Finalmente se incluirá entre los colectivos afectados a los trabajadores de mayores de cuarenta años como ‘trabajadores maduros’».

Para añadir a continuación:

«En las medidas sobre ‘fomento del empleo para determinados grupos de trabajadores desempleados’ se mantendrán las líneas actuales, aunque su regulación se refundirá con la

contratación temporal y se les aplicarán las mismas limitaciones para evitar la acumulación de supuestos y la aparición de empresas ‘champiñón’»⁴⁴⁰.

Meses después —en concreto en septiembre de 1982— cuando prácticamente se encontraba cerrado el programa electoral, el Área de Estudios y Programas de la CEF del PSOE, sintetizaba la posición del *partido* en tal campo a un escaso mes de las elecciones. Bajo el título, “Un nuevo marco de relaciones laborales”, la cautela política-programática seguía constituyendo la inmutable seña identitaria del socialismo con respecto a la política de empleo, así como en todo lo que tuviera relación con el mundo económico. O dicho con otras palabras, tal documento constituía un ejemplo más del lenguaje político tan calculado de los socialistas en aquel tiempo, en donde a lo más que se llegaba era a una suave crítica al *poder omnímodo de los empresarios* que bien casaba con la entonces retórica obrerista del PSOE: “No se trata de eliminar ni siquiera cuestionar los poderes del empresario o de sus representantes. Se trata de que estos poderes no sean omnímodos o se ejerciten arbitrariamente”⁴⁴¹. Una retórica, en cualquier caso, bastante matizada, pues ya estaba presente la identificación, según ciertos postulados modernizantes, de cómo el “trabajador es un ciudadano inserto en una sociedad que presenta rasgos injustos y discriminatorios para ellos”.

Por lo demás, el propio *informe* contenía todos los elementos ya clásicos sobre la necesidad de democratizar el SERL, de institucionalizar el papel de los sindicatos y, en último término, de *romper* con el modelo de relaciones individuales característico del franquismo. Aquí también sin mayores detalles de los necesarios, pues, se hablaba de cómo tal modelo debe “tener unas bases distintas”, para remarcar a continuación sin “cambiar la estructura del poder sin menoscabo de la producción y de la buena marcha de la empresa”. La *cosa* quedaba, pues, llamada a establecer “ciertos límites” en la relación entre empleadores y empleados.

En el campo estrictamente laboral se redundaría en la posición mantenida en el documento de febrero de 1982. A título de novedad menor, se volvería a la carga con la denuncia del “carácter regresivo de la regulación” del Título I del ET. De esta forma, por un lado, se apostaba por la contratación indefinida como la vía mayoritaria de acceso al empleo, a la par que se consideraba como necesaria la idea de regular más fehacientemente el contrato temporal. Sin especificar ni ofrecer propuestas alternativas, lo que allí si se podía entrever, por último, era una crítica a la instrumentalización de la contratación temporal por parte de los empresarios como medio de sustitución de fijos por temporales:

«Los empresarios llevan a cabo una política de reducción de los costos salariales a través de una dinámica de sustitución de los contratos de duración indefinida por otros tipos de contratos que facilitan una incontrolada flexibilización de plantillas. Esta reducción de los trabajadores fijos de plantilla viene acompañada por una mayor facilidad para la movilidad interna y geográfica del trabajador. Por ello, desde la perspectiva de nuestro partido es necesario una legislación de sostenimiento al empleo basada en la regulación de los contratos temporales, tiempo parcial o beneficiados».

Así la defensa de la *causalidad* de la contratación laboral se constituía, finalmente, en el postulado más definitorio de la indefinida política de empleo socialista:

«Los empresarios, especialmente en la pequeña y mediana empresa deben disponer de una cierta flexibilidad en la contratación de los trabajadores. No obstante, este tipo de contratación no debe constituir una ruptura de regla general que inspira nuestra legislación

⁴⁴⁰ AHFFLC, PSOE-CEF, Secretaría de Estudios y Programas, “Un objetivo prioritario: El empleo”, Madrid, 1982, sig. 00288-002, pp. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

⁴⁴¹ En el propio documento se puede leer: «No se trata de eliminar ni siquiera cuestionar los poderes del empresario o de sus representantes. Se trata de que estos poderes no sean omnímodos o se ejerciten arbitrariamente». AHFPI, PSOE-CEF, Área de Estudios y Programas, “Un nuevo marco de relaciones laborales”. Madrid, 6 de septiembre de 1982, sig. AI-136-06, p. 2.

laboral: el contrato de duración indefinida debe seguir siendo el contrato de referencia y el objetivo a conseguir»⁴⁴².

Visto todo lo anterior una primera valoración, a modo, quizás, de conclusión, puede y debe realizarse. Frente a la idea comúnmente asentada –aunque carente de base interpretativa y documental– de que el PSOE primero y el Gobierno socialista después, apostaban, de entrada, por un mayor control de la temporalidad y por tanto se oponían a una mayor flexibilización del marco de relaciones laborales; en el momento en que se revisa la muy escasa documentación disponible es tal la vaguedad programática buscada –junto con la indefinición de una política de empleo teóricamente alternativa– que difícilmente pueda afirmarse lo anterior en esos precisos términos. Si bien no decir que el PSOE careciera de una política de empleo definida, la misma era lo suficiente *flexible* para adoptar diferentes vías de solución al problema del empleo.

Como ya se ha avanzado, por tanto, esta posición a favor de la contratación indefinida y de una mayor regulación de la temporalidad en ningún caso –como en otros tantos asuntos– hacían pronosticar que, en menos de medio año, se modificaría radicalmente este posicionamiento en un sentido liberalizador. Todavía más, si se tiene en cuenta que a los pocas semanas de inaugurar la II Legislatura se aprobaba el RD 3887/1982, en donde por vez primera desde la publicación de la LRL, se llevaría a cabo una muy parcial limitación de la contratación temporal⁴⁴³.

«La temporalidad aparece así, no sólo como el (pretendido mal) uso que de los dispositivos creados desde las normas hacen las empresas, sino como un proyecto político».

Lorenzo CACHÓN, *Juventud y empleos*⁴⁴⁴.

Prácticamente recién llegado a su despacho Joaquín Almunia, junto con su equipo⁴⁴⁵, tuvieron que tomar un primer conjunto de decisiones con carácter urgente, en lo básico, ya que se acaba el año. Entre las primeras de estas decisiones estaría prorrogar, con una serie de ligeros matices, el RD 1445/1982 aprobado por el último Gobierno de UCD que expiraba su vigencia a finales de diciembre de 1982.

No habría, en verdad, mucho tiempo para más, sobre todo teniendo en cuenta el *vendaval legislativo* que acompañaría a las primeras semanas del nuevo Ejecutivo socialista, en donde además de poner en marcha el proyecto de las 40 horas, se iniciaría la negociación del futuro AI'83, entre otro conjunto de decisiones de calado. Con un *capital político* intacto, la principal duda giraba en torno hasta dónde llegarían los socialistas en su apuesta “recortadora” de la flexibilización de las relaciones laborales impulsada por la UCD. Especialmente, cuando un aguerrido Almunia había salido a *la calle* meses antes y denunciado que el mercado de trabajo había alcanzado la suficiente como necesaria flexibilidad.

Aunque el asunto de la ampliación de la contratación temporal, siempre en un sentido más flexibilizador, había acaparado la atención sindical como mediática, en esa oleada de toma de primeras y profundas decisiones que acompañaría al *cambio socialista*, esta cuestión pasaría bastante desapercibida. De esta forma, y sin mucho margen de maniobra, el lunes 20 de diciembre Segismundo Crespo iniciaría las consultas pertinentes con los agentes sociales, según

⁴⁴² AHFPI, PSOE-CEF, Área de Estudios y Programas, “Un nuevo marco de relaciones laborales”. Madrid, 6 de septiembre de 1982, sig. AI 136-06.

⁴⁴³ Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, *por el que se modifica el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo* [B.O.E. 31 de diciembre de 1982].

⁴⁴⁴ CAHÓN, Lorenzo, “Los jóvenes en el mercado de trabajo en España” en id. (dir.), *Juventud y empleos...*, *op.cit.*, p. 168.

⁴⁴⁵ Véase lo apuntado en el Capítulo 5, *nota 90*.

se establecía jurídicamente en el artículo 17.3 del ET. Con carácter urgente también se pediría el necesario dictamen al Consejo de Estado. Todo parecía indicar que el nuevo Gobierno limitaría suavemente la contratación temporal, mediante la elevación mínima del contrato temporal a seis meses –y ello de cara a asegurar al trabajador el mínimo de tiempo de trabajo para posteriormente cobrar la prestación por desempleo– reduciría los topes porcentuales, e impondría medidas para evitar la sustitución de fijos por temporales⁴⁴⁶. Es decir, se pretendía dar una nueva redacción al artículo 4, artículo 5 y el artículo 6.

Las esperables y lógicas reacciones no tardarían en llegar. Más allá del significativo – como también esperable– *silencio político cómplice* de la UGT, desde la CEOE considerarían el primer borrador como “restrictivo y poco fiable”, y CCOO denunciaría, abiertamente, la falta de valentía política en no tocar la contratación temporal, así como la ausencia de una “programación integral de fomento del empleo”⁴⁴⁷.

En una reunión del Secretario Confederal de Comisiones Obreras del martes 21 de diciembre, se elaboraría un *informe* a partir del borrador entregado. Se abordaría en una doble vertiente problemática el mismo: primero, el cuestionamiento de la “conveniencia de la prórroga de fórmulas de contratación que han tenido un efecto muy escaso en el terreno cuantitativo, y muy posiblemente negativo en el cualitativo, sobre el empleo”; y en segundo lugar, “la suficiencia o no de los retoques a la contratación temporal”. Se observaría como tal intento de prologar el RD 1445/1982, “frustra la urgente necesidad de una programación de fomento al empleo integrada y coherente”. Valorado como positivo la nueva redacción de los artículos 5.1.a), 5.2 y 6.2 la conclusión, no obstante, era evidente: “no rompe con la filosofía que inspiró al anterior gobierno la formulación de este tipo de contratación”. Así se proponía prorrogar el RD 1445/1982 por tan sólo tres meses, y abrir “un inmediato periodo de consultas”. Dejando también claro, en el amplio apartado de propuestas, como no se podía “considerar genéricamente el contrato temporal como fórmula de fomento al empleo”, con el fin de “[r]educir la utilización de esta figura a los casos y condiciones expuestas en la «Propuesta de Directiva de la C.E.E. en materia de Trabajo temporal, interino y contratos de duración determinada»”⁴⁴⁸.

Poco más se trascendería a la prensa sobre las consultas a los agentes sociales. Así en uno de los primeros y ajetreados Consejos de Ministros se aprobaba un 29 de diciembre la publicación del RD 3887/1982, *por el que se modifica el Real Decreto 1442/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo*⁴⁴⁹. Publicado en el BOE tan sólo dos días después, fijaba su vigencia desde el de 1 enero de 1983 hasta el 31 de diciembre de aquel mismo año. Más allá de su contenido –en el que nos detendremos a continuación– y de las reacciones en sentido negativo que produciría, también quedaría evidenciado, a las primeras de cambio, las *formas* con que se procedería desde Trabajo. Una dinámica que se consolidaría a un ritmo veloz en los siguientes meses.

Un hecho, en todo caso, que no escaparía al escrutinio de los medios de comunicación. Así Rodolfo Serrano escribiría en *El País*, como tal forma de proceder “vulnera uno de los principios en los que los sindicatos basaron su aceptación de los mismos”, en base a los propios acuerdos –públicos y secretos– alcanzados en el ANE. “Salvo que las negociaciones se hayan

⁴⁴⁶ Noticia, “Consultas para modificar la contratación temporal”, *El País*, 21 de diciembre de 1982.

⁴⁴⁷ Noticia, “Trabajo pretende prorrogar en 1983 la contratación temporal”, *El País*, 24 de diciembre de 1982.

⁴⁴⁸ AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 21-XII-1982”, Madrid, sig. 003-024, y “Documento adjunto al acta del Secretariado de fecha 21-XII-1982. Sobre el borrador del «Proyecto de Real Decreto» sobre medidas de fomento al empleo”. Informe redactado por Alfonso Vázquez y José M^a Corell.

⁴⁴⁹ Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, *por el que se modifica el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo* [B.O.E. 31 de diciembre de 1982].

llevado en el más absoluto de los secretos, el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, sólo atendió una consulta pública con los sindicatos en la que les entregó un proyecto de decreto”, escribiría el propio periodista. Para a continuación también advertir como tal forma de actuar se había llevado con un “exceso de cautela”, y dejar, asimismo, apuntando lo siguiente:

«[El] actual titular de trabajo [...] en uno de sus escasos encuentros con los periodistas comentó que ‘el borrador que anda circulando por ahí no es, desde luego, el mío’. Afirmación que provocó el desconcierto entre los sindicatos, ya que el único borrador [que finalmente se aprobaría] que circulaba era el que el propio ministro les había entregado días antes».

No faltarían, consiguientemente, las dudas acerca de si se habían producido o no reuniones *secretas* y/o *reservadas*: “Sorprendentemente, la decisión del Ministro de Trabajo [...] no ha hecho surgir las protestas sindicales que, en función de posturas anteriores era lógico de esperar”. Ni por parte de CCOO –la central más crítica al respecto– ni por UGT, quien “prácticamente se ha limitado a aceptar los decretos, aunque negociado directamente con el ministro la modificación de determinados puntos”⁴⁵⁰. O lo que es lo mismo, UGT había demostrado, también a la primera de cambio, su capacidad de influencia al negociar en *secreto* –y aquí seguimos las tesis de Oliet Palá– iniciándose un modelo y una dinámica que se mantendría, a grandes rasgos, durante toda la primera legislatura socialista⁴⁵¹.

Así pues, los debates y negociaciones sobre la contratación temporal volvían a internarse, pues, por los cánones consabidos del oscurantismo mediático y del secretismo negociador, favorecidos en aquella ocasión por las fechas navideñas⁴⁵².

Incluso la siempre bien informada UGT, involucrada en aquellos primeros compases en las negociaciones de las 40 horas, pero también preocupada por la *externalización* de cuadros ugetistas a tareas gubernamentales –por ejemplo, Jerónimo Saavedra o Ramón Jáuregui, sobre los que se verterían serias críticas por *abandonar* sus respectivas responsabilidades– apenas se prestaría mayor atención sobre tales negociaciones. Así en la única mención que se haría al respecto en las actas de la CEC de UGT en la reunión del 20 de diciembre, se decía tan sólo: “Informa el compañero Corcuera de la modificación que piensa hacer el actual Gobierno, sin que se tomen decisiones concretas al respecto”⁴⁵³. Incluso en la siguiente reunión celebrada el martes 28 de diciembre, y abierta la negociación del futuro AI’83, tampoco se tomaría posición alguna⁴⁵⁴. De esta forma, tan sólo asentaría públicamente su postura –ni antes ni después se publicaría un comunicado de prensa al respecto– en una crónica de *Unión* correspondiente al

⁴⁵⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno impide que la contratación temporal cubra puestos fijos y rebaja los porcentajes de eventuales”, *El País*, 3 de enero de 1983. Véase también: Noticia, “Prorrogada la legislación de contratos temporales por un año”, *El País*, 2 de enero de 1983.

⁴⁵¹ En concreto, Oliet Palá señalaría: «La UGT prácticamente se limitó a aceptar los decretos sin explicitar críticas. O mejor pactó –en ese ámbito íntimo y opaco que empezaba a funcionar– con el Gobierno ese desarrollo legislativo. Claro que consiguió que se redujeran los porcentajes eventuales en relación con los fijos. Pero ese acuerdo solo se explica en el contexto de un proceso de intercambio más amplio en el que estaban en juego contrapartidas como la reducción de la jornada, la ampliación de las vacaciones, las elecciones sindicales [...] el fortalecimiento de la presencia sindical en la empresa». OLINET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 144.

⁴⁵² Que el tema de la contratación temporal era un asunto en extremo delicado, política y sindicalmente, también lo evidenciaría la publicación de, Noticia, “Un fenómeno «preocupante»”, *El País*, 3 de enero de 1983. Y ello en unos momentos en que en lo más complicado de la crisis, incluso la contratación temporal descendía: Noticia, Rodolfo Serrano, “La contratación temporal ha descendido desde la firma del Acuerdo Nacional de Empleo”, *El País*, 6 de enero de 1983.

⁴⁵³ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 20.12.82”, sig. 002561-002.

⁴⁵⁴ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 28.12.82”, sig. 002561-002 Una situación que también se iba a reproducir en la Reunión del Secretariado Confederal de CCOO aquel mismo martes 28 de diciembre: AHT, CCOO-SC, “Información organizativa sobre negociación Patronal-Sindicatos”, Madrid, 28 de diciembre de 1982, sig. 003-025.

mes de enero bajo el título: “Positivo, dado su carácter de excepcionalidad”. Valorado “positivamente” en tanto “afecta el criterio de excepcionalidad de estos contratos”, veía en el RD 3887/1982, la vía adecuada para evitar el proceso de sustitución de fijos. No obstante, se advertía como la “UGT estima insuficiente esta reforma parcial del real decreto del 25 de junio, ya que considera necesario reestructurar las medidas de fomento del empleo”. Tampoco se mostraba conforme con aquella prórroga en los siguientes aspectos: “No considerar la participación de las comisiones ejecutivas provinciales del INEM para modificar las limitaciones”; “No contener la enumeración de los colectivos de trabajadores susceptibles de ser contratos temporalmente”; “Mantener la posibilidad en las empresas entre 1 y 25 trabajadores, de que pueda ser contratada el 100 por cien de la plantilla”. Así bajo la apariencia de cierta concordia con el Ejecutivo, las diferencias quedaban marcadas⁴⁵⁵.

Pero yendo al propio Real Decreto, con el mismo se abriría una breve etapa cronológica, en donde se hace necesario distinguir dos procesos paralelos, cada uno de ellos con sus tiempos políticos y jurídicos: el primero de estos procesos estaría marcado por la continuidad, a grandes trazos, de la misma política laboral de los gobiernos centristas, con la publicación, justamente, del RD 3887/1982. Al mismo tiempo, debe tenerse presente un segundo proceso paralelo marcado por el proceso negociador que conduciría a la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Todos estos procesos –político-social y jurídico– seguirán, a pesar de su clara interconexión, lógicas dispares. Lo que hace, por tanto, necesario diferenciar, en la medida de lo posible, su examen histórico sin que por ello se pierda ninguna de las perspectivas consideradas aquí fundamentales.

En primer término, ha de reseñarse como la propia *Exposición de Motivos* del citado RD 3887/1982 no introduciría mayores novedades legislativas. Así se podía leer como uno de los motivos que justificaban su propia aprobación giraba en torno al objetivo de “reanimar el mercado de trabajo”⁴⁵⁶ a la par que “evitar un vacío legal que impediría la utilización de la contratación temporal”⁴⁵⁷. No obstante, con la aprobación de esta legislación –como se ha insistido en más de una ocasión– se rompía la tendencia anterior de ir incrementando a través de las cuñas flexibilizadoras las posibilidades de contratar temporalmente. O dicho de otra forma: a efectos prácticos se constituiría en la única disposición legislativa –y parcial– limitativa de la contratación temporal en toda la época socialista:

«El gobierno cree preciso prorrogar su vigencia introduciendo aquellas modificaciones que la propia experiencia aconseja a efectos de conjugar, en la medida de lo posible, la necesidad de utilización de esta figura contractual y las garantías para evitar la desnaturalización de su finalidad»⁴⁵⁸.

Cuando se procede a revisar el contenido del Real Decreto, artículo por artículo, nos encontramos con las siguientes novedades no menores, en ningún caso, en perspectiva comparada. La primera en el artículo 5.1 en tanto se reducía la duración máxima del contrato temporal a 2 años con una duración mínima de 6 meses. Si se sigue avanzando en el artículo 6.1 se procedía a una nueva limitación en el uso de esta figura contractual al reducir el porcentaje de contratos de este tipo para las empresas en función de su plantilla⁴⁵⁹. Y finalmente nos

⁴⁵⁵ “Positivo, dado su carácter de excepcionalidad”, *Unión*, n° 35, (1983), p. 3.

⁴⁵⁶ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, op.cit., p. 160.

⁴⁵⁷ *Exposición de Motivos* del Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo.

⁴⁵⁸ *Exposición de Motivos* del Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo.

⁴⁵⁹ «6.1. Los contratos temporales, a que se refieren la presente sección y la primera del Capítulo III del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, estarán sujetos a limitaciones en función de la plantilla fija del correspondiente centro de trabajo, con arreglo a la siguiente escala: a) Plantilla de más de 1.000 trabajadores: 5 por 100; b) Entre 501 y 1.000 trabajadores: 10 por 100; c) Entre 251 y 500: 15 por 100; d) Entre 101 y 250: 20 por 100; e) Entre 51 y 100: 25 por 100; f) Entre 26 y 50: 49 por 100; g) Entre 1 y 25: 50

encontramos con una tercera restricción en el artículo 6.2. Una restricción destinada a evitar el encadenamiento de este tipo de contratos temporales en un mismo puesto de trabajo⁴⁶⁰.

Por lo demás, dos últimas notas han de resaltarse: se avisaba ya en aquel Real Decreto de 29 de diciembre de 1982, la intención del gabinete socialista de revisar las medidas de fomento del empleo de cara a su correcta *adaptación y adecuación*⁴⁶¹. En segundo lugar, aprobado aquel RD, y en la perspectiva de que la contratación temporal no se volvería a tocar en un largo tiempo, lo que no era imaginable para los agentes sociales —especialmente los sindicales— es que desde Trabajo en menos de cinco meses, a través de la Orden de 9 de mayo de 1983, *de desarrollo del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, modificado por el Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo*, se eliminarían todas y cada una de las medidas limitadoras de la contratación temporal. Otro temprano aviso de lo que vendría en no mucho tiempo en el siempre unidireccional camino hacia la flexibilización total del SERL, a partir de entonces⁴⁶².

Por estas vías delineadas —y sin tener presente, claro está, la recién citada Orden de 9 de mayo de 1983— hasta aquí llegarían las limitaciones a la contratación temporal por parte de los ejecutivos socialistas en sus cerca de catorce años de gobierno. En todo caso y como destacarían María Emilia Casas, Antonio Baylos y Rafael Escudero los socialistas harían gala, en un primer instante, del,

«principio según el cual los contratos temporales constituirían un ‘recurso excepcional’, evitándose que represente para algunos colectivos la única vía posible para el acceso a un trabajo remunerado. Era evidente que las modificaciones de diciembre de 1982 no alcanzaban a cumplir dicho objetivo, pero podían iniciar el camino hacia el mismo»⁴⁶³.

La historia del AI’83 se puede resumir, coloquialmente, de la siguiente forma: no hubo en la historia de la concertación social ningún acuerdo fácil ni sencillo. Y ello que el propio AI’83 no dejaría de ser un acuerdo estrictamente salarial y de mínimos, muy debajo de lo acordado, de forma previa, en el ABI, el AMI o el propio ANE. Un acuerdo, por cierto, que ha concitado muy escasa atención académica, a pesar de constituir el antecedente más directo del AES, y en donde ya se instalarían no pocas dinámicas negociadoras claves. Y pese a lo dicho, sin embargo, hemos de reconocer con Alberto Oliet Palá, como el AI’83, a su manera,

por 100, pudiendo llegar hasta el 100, previa comunicación a la Dirección Provincial del INEM. Se considerará plantilla fija del centro de trabajo, a los efectos de lo establecido en la presente disposición, la integrada por los trabajadores fijos de plantilla y fijos de obra de cada centro de trabajo». Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, *por el que se modifica el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo*.

⁴⁶⁰ «No se podrán realizar contratos temporales para cubrir puestos de trabajo que hayan quedado vacantes por terminación de otro contrato temporal, despido improcedente o expediente de regulación de empleo durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la contratación». Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, *por el que se modifica el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo*.

⁴⁶¹ Así se podía leer en la propia *Exposición de Motivos*: «Sin perjuicio de que se haga necesario una revisión de la totalidad de las medidas de fomento actualmente vigentes». Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, *por el que se modifica el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo*.

⁴⁶² Orden de 9 de mayo de 1983, *de desarrollo del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, modificado por el Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo* [B.O.E. 14 de mayo de 1983].

⁴⁶³ CASA BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y..., *op.cit.*, p. 328.

aparecería entonces como “la punta de *iceberg* de un proceso más completo” de un inmediato futuro de reformas legislativas⁴⁶⁴.

Entre el 27 de diciembre de 1982 al 5 de febrero durarían las negociaciones oficiales, a través de diez reuniones públicas –más otras tantas restringidas a través de una Comisión de Trabajo creada *ex profeso*– y a tres bandas. Ahora bien, los antecedentes como los posteriores *coletazos* nos abocan a un tiempo más largo.

En donde hoy se encuentra ubicada la Dirección General de Empleo, en la calle Pío Baroja, número 6, de Madrid, entre la Avenida del Mediterráneo y la Calle Doctor Izquierdo, tendrían lugar dichas negociaciones en el antiguo Instituto de Estudios Sociales y de la Seguridad Social. Similares escenarios a otras negociaciones, con prácticamente mismo reparto de actores y más de una *carta marcada* de forma previa.

Con la memoria viva de por donde habían transcurrido el acuerdo “agónico” del ANE así como su lenta muerte, parecía a todas luces –como en parte se ha mencionado– como de cara a 1983, y más tras la aplastante victoria socialista, lo más probable es que se fuera a un simple acuerdo interconfederal. No obstante, en un principio no se descartaría negociar un posible Acuerdo Social más amplio. Una posibilidad que se vino abajo tras la primera frustrante reunión.

En el terreno de las novedades, además del cambio político, ha de destacarse la advertencia de que el Ejecutivo no intervendría en las negociaciones y que, por tanto, tan sólo se trataría un acuerdo entre los agentes sociales. Como advirtió Rubén Vega, aquello supondría un paso atrás para las pretensiones ugetistas:

«La apertura de un marco negociador tripartito en el que estuviera presente también la patronal conduciría a una renegociación del programa de la que no podrían salir sino retrocesos, al abrir nuevamente el diálogo sobre las cuestiones que el sindicato ya ha acordado con el partido y, que una vez convertidas en promesa electoral, constituyen un contrato solemne con los ciudadanos»⁴⁶⁵.

Ahora bien, la gran pregunta era: ¿funcionaría el pacto acordado en “El Parrillón” entre el PSOE y la CEOE unos meses antes?⁴⁶⁶ Poco tiempo se tardaría en descubrir. Eso sí, lo que no se esperaba es que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales realizará tan excelsa escenificación y se mostrará tan agresiva, si entendemos que, en realidad, estaba cumpliendo las peticiones del propio Miguel Boyer cuando solicitaría a Ferrer Salat y José María Cuevas, ser los más duros posibles; y advertirles que la intención del Ejecutivo pasaba, en primera instancia, por un acuerdo interconfederal y que más tarde ya se vería la posibilidad de un acuerdo social más amplio.

Del lado sindical, las posibles expectativas no contemplaban un escenario muy diferente al de anteriores ocasiones, más tras el anuncio del Gobierno de que se mantendría a un lado y no interferiría. Cuando todavía no se habían asentado las bases del juego, sin embargo, todo una serie de señales externas se habían transmitido desde el *minuto cero*: desde no pocos nombramientos “liberales” en puestos claves, pasando por las primeras medidas adoptadas en el Consejo de Ministros del 6 de diciembre, junto con toda una serie de declaraciones públicas, o directamente la forma de proceder en la prórroga del RD 1445/1982. Lo que todo convenientemente sumado evidenciaba signos preocupantes desde esta misma perspectiva. *Signos* que se reforzarían en una perspectiva no sindical durante diciembre de 1982 a febrero de 1983.

Así el futuro AI’83 se transformaría en la primera pequeña gran prueba de resistencia y confianza para el conjunto de la familia socialista: ¿funcionaría la alianza y la estrategia de

⁴⁶⁴ OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 142.

⁴⁶⁵ VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, op.cit., p. 131.

⁴⁶⁶ Véase la nota 42.

poder del conjunto del socialismo español?⁴⁶⁷ Sin duda era uno de los grandes interrogantes a descubrir. Apoyado sin fisuras el programa socialista en donde la central socialista había participado en profundidad⁴⁶⁸, resultaría que cuando ni siquiera se había abierto la negociación, desde la UGT ya se habían adoptado ciertas medidas previsoras, que habían empezado por rechazar la posibilidad de que José Luis Corcuera fuera nombrado Ministro de Trabajo. Pero no sólo, pues desde el principio se advertiría –a título teórico y publicitario– que la central socialista no renunciaría a su autonomía sindical. Más aún en un duro editorial de *Unión* se indicaría: “La Unión General de Trabajadores no va a dar ningún cheque en blanco a ningún partido político, ni al próximo Gabinete ministerial, tenga éste la composición que sea”⁴⁶⁹. Por lo demás, su objetivo pasaba por hacer cumplir el programa electoral socialista en materia laboral y sindical. Sumado, finalmente, a un cada vez más evidente desmarque de CCOO, cuando ni siquiera había empezado la nueva legislatura⁴⁷⁰.

De esta forma, desde mediados de noviembre del 82, se empezaría a preparar pacientemente el escenario de la negociación colectiva. Encargado José Luis Corcuera de elaborar las posiciones base, que, en primer lugar, y en consonancia con el programa electoral socialista, se apostaría por el mantenimiento del poder adquisitivo⁴⁷¹. No puede obviarse, que estos tanteos preliminares se estaban realizando, en paralelo, a los últimos compases de las elecciones sindicales, y un tiempo en que había que delimitar el papel del Partido y del Sindicato frente al Ejecutivo socialista⁴⁷². De hecho, no faltarían las dudas y las discrepancias de la CEC de UGT en este tiempo sobre cómo afrontar tales procesos⁴⁷³.

⁴⁶⁷ Una de las claves para entender la respuesta afirmativa, sería la explicación dada por Javier Astudillo: «En conclusión, la UGT apoyó el corporativismo de oferta (aceptando la moderación salarial en la negociación colectiva centralizada) porque pensaba que era, dado un contexto de crisis económica, debilidad sindical e incluso democrática, el mejor modo de proteger a todos los trabajadores (objetivo clásico de los sindicatos socialdemócratas), así como de fortalecer a los sindicatos (objetivo propio de sindicatos salidos recientemente de un largo período de clandestinidad), sin suponerle costes organizativos (como podría haber sido la pérdida de audiencia sindical), sino todo lo contrario. Aún así, la aceptación de la coordinación económica por parte de la UGT tuvo que implicar un cierto grado de confianza de este sindicato en que las políticas económicas del Gobierno socialistas, más centradas en el lado de la oferta de la economía, produjesen los resultados esperados, pues lo tradicional había sido utilizar esta clase de acuerdos con política decididamente expansivas». ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, op.cit., p. 191.

⁴⁶⁸ Véase la denominada ‘Alternativa sindical del PSOE’ en *Unión*, nº 29, (1982), pp. 1 y3. El responsable en aquella ocasión de coordinación entre ambas organizaciones sería Manuel Chaves.

⁴⁶⁹ Editorial, “La coherencia de una estrategia sindical”, *Unión*, nº 29, (1982), pp. 2. Véase también: Editorial, “UGT, ante las elecciones legislativas”, *Unión*, nº 30, (1982), pp. 1-2. Y, por último, REDONDO, Nicolás, “La hora de los socialistas”, *Unión*, nº 30, (1982), p. 1.

⁴⁷⁰ Sabedores de la difícil situación en la que había quedado el PCE a partir del día 29 de octubre de 1982, no se descartaba una radicalización pero sobre todo una «crisis en el seno de CCOO». Editorial, “Cambio sindical y crisis comunista”, *Unión*, nº 2, (1982), p. 2.

⁴⁷¹ En este sentido, reveladora resulta, Entrevista a “José Luis Corcuera”, *El Socialista*, nº 285, (1982), p. 27, publicada a finales de noviembre. Una entrevista en donde descartaría la presencia del Gobierno y afirmaría la imposibilidad, por el momento, de ir hacia otro ANE.

⁴⁷² AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 16.11.82”, sig. 002561-002. En aquella misma reunión además de la preocupación manifestada por «delimitar las áreas en las que UGT debiera participar en el desarrollo del programa socialista», se decidiría asimismo elaborar una «carta [...] a todos los parlamentarios ugetistas, recordándoles por una parte, sus deberes para con la Organización, y por otra, el interés que supone para la UGT y para los trabajadores en general, su presencia en unas Cámaras en que se van a desarrollar el contenido del programa electoral». A continuación se indica la lista de congresistas y senadores de la UGT tras las elecciones de octubre de 1982. En el Congreso: Nicolás Redondo, José Luis Corcuera, Ramón Vancell, Francisco Neira, José Antonio María Amate, Manuel Chaves, Cándido Méndez, Julián Chía, Jerónimo Nieto, Alberto Acitores, Conrado Alonso, Justo Zambrana, Jerónimo Saavedra. Y en el Senado: Guillermo Fernández, Álvaro de Diego, Ángel Franco, Antonio García Correa, Tomás Seisdedos, Francisco Aíras, Antonio Rosa, Julián

Dudas que se resolverían, de forma parcial en todo caso, con la celebración del 7º Comité Confederal de UGT los días 4 y 5 de diciembre. De entrada, desde la Secretaría de Acción Reivindicativa se advertía de lo complicado de la situación y de la “necesidad de una gran flexibilidad en los planteamientos e imaginación en las tácticas de negociación”. Allí se aconsejaría plantear las “medidas de presión con una gran dosis de cautela y evidenciando la tentación movilizadora fuera de la dialéctica propia de los procesos de negociación”. Tras el repaso por los logros e insuficiencias del ANE en materia salarial a través de un balance excesivamente optimista, y tras la correspondiente llamada, a la solidaridad y responsabilidad, se abordaría el qué hacer frente a la negociación colectiva para 1983. Defendida por delante la “continuación de la política de negociación frente a la crisis” y confiando en el cumplimiento del programa electoral del PSOE –“de que no piensa adoptar una política de disminución de salarios reales”– se apostaría, en primera instancia, por diversificar y enriquecer las materias objeto de posible negociación, optando por la “fijación incremento salarial en base a la inflación prevista y revisión semestral de ajuste IPC”, a nivel sectorial, y de “negociación de incrementos salariales adicionales en función de acuerdos de la productividad”, ya en la negociación a nivel de empresa⁴⁷⁴.

Debatidas y discutidas se aprobarían tales tesis, teniendo presente que en el próximo futuro se deberían ampliar dichos contenidos. Eso sí, todo lo anterior con no pocos matices. Primero, antes de tomar ninguna decisión se convocaría un “Comité Confederal Extraordinario para posibilitar la firma o no de un posible acuerdo interconfederal”. Delegada hasta ese momento la CEC para ir tomando las decisiones oportunas, también se acordaría una reunión de “carácter bilateral y no tripartito” con el Ejecutivo. Sobre la banda salarial se optaría por una “[p]revisión del IPC en el centro de la banda” y exigencia de una cláusula salarial. A lo que sumaba el siguiente mandato: “El contenido debería poseer pocos puntos concretos y el resto de los temas debería ser remitido a convenios de ámbito menor pero con un mandato más imperativo”⁴⁷⁵.

Y, por otra parte, Comisiones Obreras afrontaba el inicio de la época socialista con no pocas dudas. La redefinición y actualización de la nueva estrategia a seguir, había conllevado no pocos esfuerzos teóricos y de reordenación estratégica⁴⁷⁶. En septiembre de 1982 en un importante CS de CCOO no sólo se aprobaría una *resolución ante las elecciones*, en donde además de llamar a la “participación de los trabajadores”, aconsejaba votar a la *izquierda*.

En la misma cita, un precavido Marcelino Camacho sabiendo lo que se aproximaba presentaría un largo informe en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal. Examinado el escenario tras la disolución de las Cortes, denunciaría el descarado apoyo de la CEOE a UGT en las elecciones, acusando directamente al “Gabinete de la calle Tucumán, que preside Fabián Márquez” de organizar un equipo compuesto por más de medio centenar de personas para apoyar a UGT en las elecciones sindicales, a lo que había que sumar el apoyo de los grandes medios de comunicación. “Después de las elecciones, ¿qué?”, se preguntaría cuando ya se

Aldudo y Emilio Castro. “Los trabajadores estarán representados en las nuevas Cortes”, *Unión*, nº 32, (1982), p. 3.

⁴⁷³ Véase al respecto: AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 30.11.82”, sig. 002561-002.

⁴⁷⁴ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Acción Reivindicativa, “Informe Secretaría de Acción Reivindicativa al VII Comité Confederal. Diciembre 1982”, Madrid, 4 y 5 de diciembre, sig. 002605-006.

⁴⁷⁵ AHFFLC, AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Organización, “Acta de la reunión ordinaria del VII Comité Confederal de la Unión General de Trabajadores celebrada en Madrid, los días 4 y 5 de diciembre de 1982”, sig. 002605-006. Véase también: “El acuerdo tendrá que ser de eficacia general”, *Unión*, nº 34, (1982), p. 3.

⁴⁷⁶ Especialmente clarificador resulta leer: CAMACHO, Marcelino, “Aliados posibles y aliados necesarios”, *Gaceta Sindical*, nº 24, (1983), pp. 4-5 Y asimismo otro artículo bastante más difundido como atacado desde las filas socialistas: id., “El cambio posible y cambio necesario”, *Gaceta Sindical*, nº 43, (1982), pp. 4-5.

conocían desalentadores datos de las propias elecciones sindicales. Siendo consciente de la estrategia de la conquista de la hegemonía sindical por UGT, llegaría a cuestionar, inclusive, la despolitización de sus eslóganes –“UGT, la fuerza sindical para el cambio”–. El riesgo aparecía claro: una potencial desmovilización de la central socialista tras las elecciones. Más aún cuando no se podía esperar ningún proyecto real de transformación del PSOE. Tocaba, pues, seguir defendiendo el PNSPC y exigir una revisión del ET y de la Ley de Empleo⁴⁷⁷.

El desastre electoral de los comunistas en octubre de 1982, y las cada vez más evidencias de que por primer vez UGT podía ganar las elecciones sindicales –tal y como así ocurrió– harían saltar todas las alarmas. A lo que había que añadir las cada vez más distancias entre CCOO y UGT, que venían incrementándose desde hacía meses. Sabedoras de la nueva correlación de fuerzas, tocaba, pues, comprobar los límites de la voluntad del cambio de los socialistas, y de la capacidad de resistencia de la siempre débil y cortoplacista “unidad de acción”. A todo lo anterior se sumarían las tensiones no resueltas del II Congreso Confederal de CCOO entre las diferentes *corrientes* –a las que siempre tanto temió el propio Camacho– en torno a la propia *unidad de acción*, y que se evidenciarían tras la propia victoria del PSOE en la primera reunión del Secretariado Confederal. Allí el sector encabezado por Julián Ariza cuestionaría unas declaraciones del propio Camacho llamando a una “gran organización Sindical pluralista”. Sin duda un mal comienzo. De cualquier de las formas, a partir de esa misma reunión celebrada el 1 de diciembre ya se marcarían los criterios frente a la próxima negociación colectiva. En un comunicado al respecto del “discurso programático del candidato presidente del Gobierno”, en el que se denunciaría la falta de “referencias a la concertación social”, la C.S. de CCOO se marcaría como punto de partida “la defensa del poder adquisitivo de los salarios y su revisión semestral”⁴⁷⁸.

Cuando no había transcurrido ni quince días del primer Consejo de Ministros, todos los implicados se preparaban para la configuración y definición del marco de negociación colectiva del año 1983. Negociaciones que se preveían cortas en el tiempo, y también no muy complicadas. Todos los pronósticos fallarían una vez más. Como se ha avanzado, a calentar las pre-negociaciones vendrían las prontas declaraciones de la CEOE, más tras conocerse la aprobación del proyecto de las 40 horas que, en buena medida, marcarían los límites de las negociaciones⁴⁷⁹. Cuando todavía no había fecha para la primera reunión oficial, la CEOE

⁴⁷⁷ AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión extraordinaria del Consejo Confederal del día 9-IX-1982”, Madrid, sig. 1-23. En la misma se incluía, “Resolución ante las elecciones Políticas”; y, “Informe presentado por M. Camacho, Secretario General, al Consejo Confederal, el 9 de septiembre de 1982, en nombre de la Comisión Ejecutiva”.

⁴⁷⁸ AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 1-XII-1982”, Madrid, sig. 003-23. Incluye: CCOO, Secretaría de Información y Publicaciones, “Resolución adjunta al acta del secretariado de fecha 1-XII-82”; CCOO-Secretaría de Información y publicaciones, “Valoración de CCOO. Sobre el discurso programático del candidato presidente del Gobierno”. Véase asimismo el acta de la siguiente reunión en donde se aprobaría la Comisión Negociadora encabezada por Julián Ariza y Agustín Moreno y en la que se decidiría, asimismo, reforzar todos los canales de comunicación entre los diferentes órganos de dirección mientras que dudara la negociación del AI’83: AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 21-XII-1982”, Madrid, sig. 003-24. Por lo demás, véase el clarificador artículo publicado a finales de diciembre en *El Socialista* acerca de la unidad sindical propuesta de Camacho, en donde se cuestionaba su *sinceridad y utilidad*. “La unidad sindical, a la palestra”, *El Socialista*, nº 289, (1982), p. 27.

⁴⁷⁹ Un proyecto de Ley que tampoco sería del agrado de la CEC de UGT en su reunión del 20 de diciembre de 1982: «Se debate sobre su contenido quedando reflejado en la mayoría de los asistentes su disconformidad con la actual redacción del proyecto, de la que se informará oportunamente al Gobierno». AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 16.11.82”, sig. 002561-002. Menos dudas se tendrían desde el PSOE quien alabaría casi como co-portavoz del Gobierno el citado proyecto, remarcando su necesidad y como figuraba en su programa electoral. Ello a pesar de todas las dudas y reticencias evidenciadas mostradas en los primeros Consejo de Ministros. Nos referimos al editorial que *El Socialista* publicó en su último número de 1982 y que concluía de la siguiente forma: «En rigor, las argumentaciones unilaterales, tanto a favor como en contra de la medida, carecen de sentido en

anunciaría –una vez conocido el proyecto aprobado en Consejo de Ministros sobre las 40 horas– que tan sólo sería posible un pacto que incluyera, primero, una banda salarial dos o tres puntos por debajo del 12% de la inflación prevista, e incluida la negociación salario por hora⁴⁸⁰. Y todo ello sin clausula de revisión salarial. Un punto de partida del todo clarificador, que acompañaba a la petición de negociar con el Gobierno de forma individual el *pack legislativo* sobre contratación temporal entre otros aspectos laborales⁴⁸¹.

El lunes 27 de diciembre se celebraría la primera reunión. Un encuentro en donde se evidenciaría lo lejos que se estaba de cualquier tipo de acuerdo, y más tras las posiciones de partida de la patronal, que incluso en medios de UGT se había leído en términos de “provocación”. Pero si de algo serviría la citada reunión sería para dejar claro que la CEOE no pensaba *mostrar sus cartas* en temas salariales, hasta que no conocieran los ejes de la política macroeconómica del Ejecutivo. Mientras tanto, los sindicatos dejarían bien claro que no renunciarían a la defensa del poder adquisitivo, para lo que estimaban una banda salarial del entre 11% al 13%, lo que por sí ya era bastante flexible. Lo anterior a sumarse junto con una clausula de revisión salarial⁴⁸².

La experiencia del ANE estaba demasiado cerca para posibles titubeos, más en un escenario en que la conflictividad laboral volvía a reaparecer con fuerza. La posibilidad de una negociación corta se esfumaba⁴⁸³. Un objetivo perseguido en un primer como efímero instante por UGT, quien exigiría, posteriormente, un “periodo de tiempo razonable” para madurar cualquier posible acuerdo, sabiendo de las dificultades que entraña la posición de la CEOE⁴⁸⁴. A partir de ahí lo que no faltarían en momento alguno serían las presiones de todo tipo por parte de los grandes centros de poder político, económico y mediático⁴⁸⁵.

una concepción conjunta de la economía. Y guste o no, la coordinación de todos los factores que contribuyen a restablecer el vigor de nuestra economía es función del Gobierno. Teniendo en cuenta que son muchos factores, no solamente económicos». Editorial, “Las cuarenta horas”, *El Socialista*, nº 290, (1982), p. 7. Véase, por lo demás, lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 425* y en el Capítulo 8, *nota 377*, *nota 378* y *nota 379*.

⁴⁸⁰ Véanse las primeras reacciones de UGT por boca de Zufiaur y Corcuera en *El Socialista* en el mes de diciembre, antes de la primera reunión en donde se contestaría a la pretensión de la CEOE de negociar salario-hora. “Solo para sindicatos y empresas”, *El Socialista*, nº 288, (1982), p. 28.

⁴⁸¹ Noticia, “Esta semana comenzarán las conversaciones para la negociación colectiva de 1983”, *El País*, 20 de diciembre de 1982; Noticia, Salvador Arancibia, “La CEOE desea una negociación por debajo de la inflación y en base a la jornada laboral”, *El País*, 23 de diciembre de 1982. A alentar estas duras posiciones vendría la Asociación Española de Banca Privada (AEB) que exigirían modificar la considerada *actitud blanda* de la CEOE de cara a negociar una banda salarial entre el 3% al 6%. Noticia, Salvador Arancibia, “La patronal bancaria presionará a la CEOE para que ofrezca una revisión salarial del 3% al 6%”, *El País*, 22 de diciembre de 1982.

⁴⁸² Desde la CEC de UGT en su reunión del 28 de diciembre se calificaría la posición de la CEOE de «postura cerrada» y se calificaría de mero *pretexto* sus reticencias. AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 16.11.82”, sig. 002561-002.

⁴⁸³ Noticia, Rodolfo Serrano, “Las centrales sindicales consideran innegociable el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios”, *El País*, 28 de diciembre de 1982.

⁴⁸⁴ AHT, CCOO-SC, Secretaria de Información y Publicaciones, “Información orgánica sobre negociación patronal-sindicatos”, Madrid, 28 de diciembre de 1982, sig. 003-025.

⁴⁸⁵ Un primer ejemplo de los intentos de presión, mediática en este caso, lo podemos encontrar en un editorial de *El País* un día después de la primera reunión. Allí no sólo se hablaría de crecientes incertidumbres empresariales y económicas ante la futura discusión del proyecto de Ley de las 40 horas, sino que se apostaría, en línea con la estrategia económica del Gobierno, por una «negociación rigurosa para los trabajadores, con un límite superior de la banda de incrementos del 9%-10%, es decir, dos o tres puntos por debajo del incremento esperado del índice del coste de la vida, puede interpretarse en parte como consecuencia de las medidas de política general hasta ahora adoptadas». Una nota editorial que concluía con otro claro mensaje: «En definitiva, una negociación rápida en la que los trabajadores acepten las austeridades que les corresponden y en la que los empresarios apuesten por el realismo político».

Sin prácticamente tiempo para mayores reflexiones, el miércoles 29 se celebraría la segunda reunión. Siempre astuta y suficientemente preparada, la CEOE presentaría un largo documento con una lista de temas a negociar de cara a remarcar su solicitud al Ejecutivo para que avanzara sus planes económicos. Rechazado tal texto como posible base común, quedaría ya también evidenciado que el tema de las 40 horas se había convertido en su gran baza negociadora⁴⁸⁶.

Después de las vacaciones navideñas –relativamente tranquilas– la negociación se aceleraría a partir de la segunda semana de enero de 1983. Ciertamente, la decisión del Gobierno tanto de no intervenir pero sobre todo de dejar para la negociación colectiva la futura aplicación de las 40 horas, a la par que debilitaría las posiciones sindicales, fortalecería a la CEOE en este tramo. Más aún tras los primeros movimientos de UGT de desmarcarse de CCOO. El motivo o motivos, las cada vez más frecuentes denuncias contra UGT de ser un mero sindicato pro-gubernamental. Denuncias que se venían acrecentadas por todo tipo de rumores –nunca desmentidos por parte de los principales interesados– acerca del compromiso del Ejecutivo de potenciar las secciones sindicales frente a los Comités de Empresa. De hecho, las dudas de la CEC de UGT sobre el futuro de tal marco negociador seguían presentes. En una reunión de su Comisión Ejecutiva celebrada el lunes 10 de enero cuando todavía se hablaba de “prenegociaciones” y no había empezado en sentido estricto la negociación, no se descartaba “flexibilizar nuestras posturas para desbloquear las negociaciones” en relación a las 40 horas⁴⁸⁷. Una débil posición que pronto se iba a volver en su contra.

Envalentonada y confiada en sus fuerzas la patronal, llevaría a cabo una gran escenificación de sus posiciones –cabe suponer que en base al *pacto* de “El Parrillón” pero también en base a sus firmes planteamientos de no asumir el mantenimiento del poder adquisitivo– en la tercera reunión del futuro AI’83 que se celebraría el 13 de enero. Un día antes, el miércoles 12, la propia CEOE había filtrado a la agencia EFE que jugaría con dos bandas salariales a lo largo de la negociación: la primera del 6% al 10% y la segunda –más realista dadas las circunstancias– del 8% al 12%⁴⁸⁸. Y así fue. Ahora bien, la puesta en juego de la primera de las *bandas salariales* apuntadas, conduciría a la práctica ruptura el proceso de negociación colectiva. Por lo que se conocería por la prensa, se hablaría entonces de una “radicalización” de las posturas de todas las partes, tras un “duro enfrentamiento entre los interlocutores de la negociación”. Ello motivado tanto por la banda salarial baja presentada por

económico y pasen rápidamente a la acción de mejorar los volúmenes de empleo». Editorial, “La austeridad y la negociación salarial”, *El País*, 28 de diciembre de 1982. Por lo demás, el último día del año se publicaría la primera y larga entrevista con el nuevo Ministro de Economía, quien haría gala de su sabiduría y dominio de los conocimientos económicos, y advertiría, claramente, de la necesidad de controlar la negociación colectiva, con el riesgo de que en caso contrario de aplicar un duro plan de estabilización. Un mensaje –como se recordaría en otro editorial de *El País*– que tenía un claro destinatario: «los agentes sociales y otros miembros del propio Gabinete», y en donde se validaban, prácticamente de forma total, su posicionamiento. Entrevista, “Miguel Boyer”, *El País*, 31 de enero de 1982; Editorial, “La inflación y el ministro Boyer”, *El País*, 11 de enero de 1983.

⁴⁸⁶ Noticia, “La CEOE pide al Gobierno su cuadro macroeconómico para definir su banda salarial en la negociación colectiva”, *El País*, 30 de diciembre de 1982. Un hecho que sería inclusive reconocido por el propio Almunia en sus *memorias políticas*: «Mientras tanto, los sindicatos y la CEOE intentaban pactar una banda salarial para 1983. La patronal amagó con retirarse de la mesa si se mantenía el proyecto de la ley de jornada en los términos en lo que habíamos enviado al Congreso, pero finalmente se pudo cerrar el acuerdo a finales de enero, aunque su firma se retrasó hasta mediados de febrero». ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*, p. 161.

⁴⁸⁷ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 10.01.83”, sig. 002561-002.

⁴⁸⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “La patronal estudia hoy la banda salarial para la negociación colectiva de 1983”, *El País*, 12 de enero de 1983; Noticia, “La CEOE propone un incremento de los salarios para 1983 entre dos y seis puntos por debajo de la inflación prevista”, *El País*, 13 de enero de 1983.

la patronal y su empeño en la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, así como por la también reducción de la jornada laboral⁴⁸⁹.

En todo caso, lo que conseguiría la CEOE con aquella reunión no entraba en sus cálculos: el mantenimiento, por el momento, de la unidad de acción entre CCOO y UGT. Reunidas ambas cúpulas negociadoras en los días siguientes, no cuestionarían en modo alguno su punto de partida irrenunciable –el mantenimiento del poder adquisitivo– aunque se mostraban abiertas a tratar el tema de la aplicación de la reducción de la jornada laboral. Empero, no se descartaba que en caso de no acuerdo, que tales posiciones se llevarán convenio por convenio, con el riesgo de un casi seguro incremento de la conflictividad laboral⁴⁹⁰.

En una reunión monográfica de la CEC de UGT el jueves 13 de enero se abordaría con todo tipo detenimiento tal situación. De lo poco que se puede saber a través de la lectura de su acta, de nuevo, se optaría por flexibilizar y evitar posturas cerradas –ello a pesar de la firme posición de la patronal– que pudieran llegar a impedir el acuerdo. Se cedería en parte a la posición de la CEOE de una “gradualización de la puesta en aplicación de la ley [de las 40 horas] en función del efecto de las medidas sobre los costes salariales, y en definitiva sobre el empleo según sector”⁴⁹¹.

A un ritmo, prácticamente, de una reunión cada dos días entre el 18 de enero al 26 de enero, las negociaciones llegarían a una situación sin salida. De bloqueo, de ruptura. La cuarta –celebrada el martes 18– finalizaría como la anterior, aunque con la decisión de crear una Comisión de Trabajo más reducida para tratar de desbloquear la negociación⁴⁹². Así pues, en paralelo, a las reuniones oficiales dicha Comisión de Trabajo comenzaría sus trabajos con escasos resultados⁴⁹³. Con estas pobres perspectivas, el quinto encuentro “oficial” celebrado el lunes 24, una vez que se había retraso la convocatoria prevista a las 10.00h para la tarde de aquel mismo día, confirmaría las previsiones de práctica ruptura tras un largo encuentro. Los sindicatos cedían –bajarían en aquella ocasión su banda salarial al 10% y el 13%, y se mostrarían dispuestos a discutir el cálculo del cómputo anual de jornada y abordar una cláusula de revisión distinta a la del ANE– mientras que la patronal se mantenía en sus posiciones⁴⁹⁴. La descripción de cómo había transcurrido la larga reunión no dejaba dudas, incluso a través de las siempre comedidas crónicas laborales: habría importantes momentos de tensión, en donde no se “ahoraron gritos ni acusaciones de inflexibilidad de posiciones”. Que no se rompiera definitivamente la negociación, sería posible, en parte, por un “último esfuerzo de CCOO y UGT”. Tras la reunión de los respectivos órganos de dirección de los agentes sociales el miércoles 26⁴⁹⁵, de donde saldría la decisión de no convertirse en los protagonistas del fin de un posible acuerdo, la CEOE en la sexta reunión –celebrada el miércoles 26 de enero– daría, prácticamente, por rotas las mismas. Una encuentro en el que sacaría su segunda baza

⁴⁸⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Patronal y sindicatos estuvieron ayer al borde la ruptura en las negociaciones del acuerdo interconfederal para 1983”, *El País*, 14 de enero de 1983.

⁴⁹⁰ Noticia, “Los sindicatos preparan hoy la negociación con la CEOE”, *El País*, 17 de enero de 1983; Noticia, Rodolfo Serrano, “CCOO y UGT muestran cierta flexibilidad en la negociación del Acuerdo Interconfederal”, *El País*, 18 de enero de 1983.

⁴⁹¹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 13.01.83”, sig. 002561-002. Argumentos que serían trasladados a, Editorial, “... y la lucha sindical continúa”, *Unión*, n.º 35, (1983), p. 2.

⁴⁹² Noticia, Rodolfo Serrano, “Los sindicatos consideran necesario fijar en el 13% el punto alto de la banda salarial”, *El País*, 19 de enero de 1983.

⁴⁹³ Noticia, Rodolfo Serrano, “Hoy, jornada decisiva para la negociación entre la CEOE y los sindicatos”, *El País*, 24 de enero de 1983.

⁴⁹⁴ Noticia, “Negociaciones entre empresarios y sindicatos, al borde de la ruptura”, *El País*, 25 de enero de 1983

⁴⁹⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “Patronales y sindicatos realizarán hoy un esfuerzo definitivo por acercar sus posturas sobre la negociación colectiva”, *El País*, 25 de enero de 1983.

negociadora: una banda salarial del 8% al 12% con negociación incluida para el tema de la jornada laboral. Aquella dureza mostrada en cada ocasión sería, inclusive, crítica en las páginas siempre comedidas de *El Socialista*. No se dudaría en calificar a los argumentos expuestos como de estériles o de tildar la banda salarial propuesta como “ridícula”, afirmado como la CEOE había optado por *retar al Gobierno* con tales puntos de partida⁴⁹⁶.

En este precario marco de operaciones, se retomarían las viejas estrategias que tan buenos resultados habían dado en años anteriores. Negociaciones y conversaciones personales con el Presidente del Gobierno, sin la presencia de CCOO, sumado a un cada vez más palpable bloqueo informativo⁴⁹⁷. Bloqueo que en realidad –y como se conoció más adelante– formaba parte de un nuevo *pacto de silencio* entre los negociadores. Pero era, justamente, el Ejecutivo quien más tenía que perder en caso de la falta de un acuerdo, ante la perspectiva de un crecimiento exponencial de la conflictividad laboral, cuando ni siquiera se habían puesto las bases de su proyecto modernizador.

Las declaraciones, los movimientos tácticos y estratégicos así como *sorprendentes* anuncios no tardarían en llegar de cara a presionar sobre el propio ritmo –público y privado– negociador. Por ejemplo, el sábado 23 Joaquín Almunia declaraba a EFE que esperaba que hubiera un “Acuerdo Interconfederal”⁴⁹⁸. Un anuncio que se producía justo el mismo día en que

⁴⁹⁶ En el número de *El Socialista* correspondiente a los días 12 y 18 de noviembre se criticaría un argumento que, más pronto que tarde, sería asumido por el propio Gobierno socialista: «El que la CEOE alegue ahora que la reducción de la jornada provocará la caída de la productividad no deja de ser paradójico, pues en los últimos años, con menos trabajadores que nunca, con más paro que nunca, se ha logrado incrementos de productividad jamás conocidos en nuestro país». DIEZ, Luis, “La CEOE no se aviene a negociar”, *El Socialista*, nº 292, (1983), p. 29. En el siguiente –correspondiente a los días del 19 al 25 de enero– se hablaba directamente de cómo la CEOE *reta al Gobierno*. Según el mismo medio, «para la CEOE esta mesa negociadora es el punto de partida para forzar al Gobierno a reducir sus costes empresariales y beneficiar la competitividad empresarial». En resumen, el análisis no podía ser más preocupante: la CEOE estaba haciendo política antes que negociando. “La CEOE reta al Gobierno”, *El Socialista*, nº 293, (1983), p. 25.

⁴⁹⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “Sindicatos y patronal se dan un plazo de 48 horas antes de anunciar formalmente la ruptura de las negociaciones”, *El País*, 27 de enero de 1983.

⁴⁹⁸ Todavía por aquellas fechas se seguía recordando desde UGT como Almunia había sido «secretario de documentación y estudios del PSOE y responsable del programa electoral de este partido [...]. Desde 1976 a 1979 fue asesor y responsable del gabinete técnico de UGT. Fue la época que se sentaron las bases del sindicalismo responsable y moderno que caracteriza hoy por hoy a esta central a la que Almunia se siente estrechamente vinculado». Todo ello como entradilla a una larga entrevista, en donde el interesado haría un llamamiento que pronto se volvería en su contra: «Si decimos que crearemos 800.000 puestos de trabajo en cuatro años es porque se han buscado las alternativas necesarias para hacerlo, y no gratuitamente. Nuestras ofertas son perfectamente realizables y no se limitan al programa como otros partidos». Entrevista, Joaquín Almunia”, *Unión*, nº 29, (1982), p. 6. También por aquellas fechas Almunia, ya como Ministro de Trabajo, sería entrevistado en *El Socialista*. Un encuentro en donde también afirmaría una serie de cuestiones que también pronto se volverían en su contra, tras defender el proyecto de 40 horas y salir al paso de las pretensiones negociadoras de la CEOE: «Bueno, nosotros hemos dicho, con ocasión de las últimas cifras de paro registrado, que aumentaron en el mes de noviembre en 100.000 personas, que el objetivo del PSOE de crear nuevos puestos de trabajo puede, en un primer momento, generar unas expectativas entre ciertos colectivos de la sociedad que hasta ahora nunca habían contemplado la posibilidad de tener un trabajo y por eso no se inscribirían en las oficinas de empleo. Por eso, mucho de los llamados ‘desanimados’ pueden ahora dirigirse a las oficinas de empleo en solicitud de algún puesto de trabajo. Ello no quiere decir que aumenten realmente los parados, sino que aumentan las expectativas de encontrar trabajo, y por eso se inscriben en las oficinas de empleo». Entrevista, “Joaquín Almunia”, *El Socialista*, nº 290, (1982), p. 30. Véase, Capítulo 2, *nota 614*. Por cierto, sobre el incesante y brutal incremento de los parados y los informes realizado por *ciertas* instituciones internacionales, el PSOE, en aquellos primeros momentos de Gobierno socialista, no tendría problema alguno en asegurar lo siguiente: «La bola de cristal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puede, por primer vez, equivocarse en sus augurios sobre España» DIEZ, Luis, “La cuesta de enero”, *El Socialista*, nº 292, (1983), p. 28. En breve, muy breve, desde el propio

se había publicado en el BOE las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, y en donde se acometería una reducción de las mismas para los empresarios⁴⁹⁹. Negada la sola posibilidad que desde el Gobierno o Trabajo se hubiera intervenido en tal proceso, llamaba a la “responsabilidad social” de las partes⁵⁰⁰. Al día siguiente, el domingo 23, también se haría público el futuro encuentro que el señor Presidente y los Ministros de Economía e Industria tendrían con centenares de empresarios en la APD, a cargo de Claudio Boada –a quien pronto se le consideraría como la *persona puente* entre empresarios y Gobierno– uno de los pesos fuertes ahora de la Administración socialista para sorpresa de propios y extraños como ya se explicó⁵⁰¹. Las formas de actuación del Ejecutivo iban tomando consistencia: se anunciaba la más que segura posibilidad de que, por primera vez, se presentará las bases del cuadro macroeconómico de actuación. Un primer ejemplo del respecto por las formas democráticas y ante todo por el funcionamiento de la vida parlamentaria⁵⁰².

Téngase, por lo demás, presente que el propio Presidente del Gobierno comparecería en *prime time* el viernes 21 para explicar la dramática situación por la que se pasaba la nación. Una primera de otras tantas intervenciones televisas del Presidente –como la que tendría lugar un 11 de marzo de 1984 en plena oleada de conflictividad obrera– gracias a las cuales los ciudadanos y ciudadanas españoles conocerían durante años la faceta humana pero también política de González Márquez a través de TVE.

Pero yendo a los contenidos, y por más que *ABC* se empeñara en resaltar una sola frase –“La unidad de España no está en cuestión”⁵⁰³– la intervención giraría principalmente sobre economía. Entrevistado por Ramón Colom en el despacho presidencial en un momento en que ya se empezaba a criticar el control y la falta de rigurosidad del ente público, centraría su mensaje en la necesidad de todo –empresarios y trabajadores– empujarán en una misma dirección en el camino de la salida a la crisis, a través de las consabidas recetas, con un llamado a la *solidaridad* y la *moralización de los comportamientos* de los ciudadanos⁵⁰⁴. De hecho, este último aspecto sería el más destacado por *El Socialista*: “Mensaje solidario de esperanza”, titularía la pieza informativa correspondiente. No faltaron cifras, referencias a la “herencia

Ejecutivo no sólo daría por válidas todas las previsiones sino que, en gran medida, asumiría como propias todas y cada una de las recomendaciones de la CEOE. Véase, el apartado “6.2. La «salida progresista» a la crisis”.

⁴⁹⁹ Real Decreto 92/1983, de 19 de enero, *sobre cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante 1983* [B.O.E. 22 de enero de 1983]. Un hecho que sería oportunamente resaltado en las páginas de *El Socialista* en su número correspondiente del 26 de enero al 2 de febrero, donde se además de afirmar lo siguiente se mostraría, en extremo, cauto: «Lo que sí parece claro a esas alturas que habrá acuerdo dentro de unos márgenes que satisfagan las aspiraciones de unos y otros». Tan cauto, siempre tomando como base de referencia las prolíficas declaraciones de Corcuera, que no descartaba como tal borrador de acuerdo «no parece contar con el agrado de ciertas bases sindicales que consideran demasiado peligroso computar anualmente la jornada por cuanto ello supondría un paso próximo al establecimiento del salario hora». De cualquiera de las maneras, se afirmaría, como llegado a ese punto, no era «previsible una ruptura dada la ‘absoluta voluntad’ de todas las partes de llegar a un acuerdo». PADILLA, Sol, “Hacia la recta final”, *El Socialista*, nº 294, (1982), pp. 27-28.

⁵⁰⁰ Noticia, “Entre sindicatos y empresarios no ha mediado el Gobierno, según Almunia”, *El País*, 23 de enero de 1983.

⁵⁰¹ Véase en el Capítulo 5, *nota 73 y nota 74*, entre otras.

⁵⁰² Noticia, Joaquín Estefanía, “Centenares de empresarios, convocados por Claudio Boada se reunirán con Felipe González, Boyer y Solchaga”, *El País*, 23 de enero de 1983.

⁵⁰³ Portada, “Felipe González: «La unidad de España no está en cuestión»”, *ABC*, 22 de enero de 1983.

⁵⁰⁴ Noticia, Fernando Jáuregui, “La economía y la información, máximas preocupaciones del jefe del Gobierno”, *El País*, 22 de enero de 1983; Editorial, “El presidente del Gobierno, en televisión”, *El País*, 22 de enero de 1983.

recibida” –que entonces ya a los cien días de Gobierno había dejado de tener parte de su *efecto mediático atrayente*⁵⁰⁵– advertencias como la de “1983 será un año todavía malo. Un año de ajustes”. Con todo, no había otra forma de hacer la política que estaba haciendo⁵⁰⁶.

A complementar tal alentador panorama en menos de tres días *El País* publicaría dos editoriales, tras la práctica ruptura de las negociaciones y las cada vez más viscerales críticas de sectores empresariales con respecto a la política económica del Gobierno⁵⁰⁷. El primero se publicaría el martes 25 de enero. Precedido de una gratuita crítica anticomunista, repartiría culpas por igual por la situación de parálisis de la negociación del AI’83. Prestos siempre a dejar matizados los mensajes, pedía a la patronal que recuperara la *sensatez* y a UGT que perdiera “el miedo” a volver a pactar, fueran cual fueran las condiciones, más teniendo en cuenta recientes ejemplos como en Italia, en donde se había acordado una escala móvil salarial. Con CCOO ni se contaba para tales labores. Así se decía: “Los sindicatos, en especial UGT, deben perder el miedo el temor a ser tildados de amarillistas por su decisión de aceptar acuerdos razonables con las organizaciones patronales”. Moderno y razonables, sin duda, constituían dos alicientes que no podían escapar a la lógica ugetista de aquel momento⁵⁰⁸.

El segundo de los editoriales –mucho más *jugoso* en términos políticos– llegaría cuando todo parecía estar perdido y ello de cara a la enésima reunión decisiva prevista para el viernes 28 de enero. En lo que no dejaba de ser un indisimulado intento de presión, de entrada, se exigía romper el mutismo político público del Ejecutivo. Una cosa era no interferir, y otra muy diferente no tomar parte. Rememorados los viejos-recientes tiempos de “consenso en las relaciones laborales que permitió acuerdos de guante blanco, en vez de peleas encarnizadas” – en una muy discutible interpretación sobre el pasado reciente– se recordaría la virtudes de la paz social y laboral. Estamos ya en otra época, según el editorialista de *El País*, en donde se había dejado la “combatividad obrera que se traducía de forma casi automática en subidas salariales y ventaja contractuales”. Pero aquel *editorial* iba uno o dos pasos más allá. Con ciertas pretensiones políticas, se hablaba de cómo un posible incremento de la conflictividad en dicho escenario no vaticinaba nada bueno. Para aclarar el asunto, se hablaba –a modo de supuesta crítica– de la potencial “politización de conflictos”, y ahí aparecía Comisiones Obreras. O dicho con otras palabras: la *alarma* ante un posible no pacto había saltado a luz pública. Recordatorio previo de las desdichas, incumplimientos y fracasos de los anteriores acuerdos sociales, “solo cabe pedir responsabilidades a las partes negociadoras y confiar en que el sentido común”, se impusiera frente al “maximalismo doctrinario, a la prepotencia arrogante y al deseo de humillar al adversario”. Con alegato final a la dramática situación de los más de dos millones de parados⁵⁰⁹.

El escenario tantas veces representado se volvía a dar en un muy parecido formato. ¿Qué ocurría, finalmente, en aquella ocasión? ¿Servirían de algo aquellas presiones? En medio

⁵⁰⁵ Véase aquí: Noticia, “Fraga estima que el recurso a la «situación heredada» no puede servir de disculpa”, *El País*, 22 de enero de 1983.

⁵⁰⁶ “Mensaje solidario de esperanza”, *El Socialista*, nº 294, (1983), pp. 13-15. Un número acompañado de un editorial que se transformaría en todo un canto a la paz y a la solidaridad, y que más parecía un extracto de una *encendida* ponencia congresual con respecto a la labor gubernamental: «De aquí, los llamamientos a la indispensable solidaridad de todos los ciudadanos, primero para paliar los efectos de la crisis, y luego para superarla. Y asimismo, la decisión inquebrantable de desarrollar el programa socialista, fuente de la esperanza de nuestro pueblo y única vía, como ya se está viendo, de forjar la España moderna». Editorial, “La realidad sobre el tapete” (p. 7).

⁵⁰⁷ Noticia, Joaquín Estefanía, “Fuentes discrepancias entre algunos dirigentes empresariales ante la política económica del Gobierno”, *El País*, 28 de enero de 1983.

⁵⁰⁸ Editorial, “La negociación salarial”, *El País*, 25 de enero de 1983. Véase meses después: Noticia, Juan Arias, “Un millón de trabajadores se manifestaron ayer en Roma contra la rebaja de tres puntos en la escala móvil salarial”, *El País*, 25 de marzo de 1984.

⁵⁰⁹ Editorial, “Un acuerdo necesario”, *El País*, 28 de enero de 1983.

de las primeras críticas contra la forma de proceder así como de las medidas económicas adoptadas por parte de medios empresariales, llegaría la aclaratoria intervención de Felipe González y sus dos hombres fuertes –Boyer y Solchaga– en la APD. Aclaratoria en cuanto a la toma de postura. En la primera de muchas futuras intervenciones en la Asociación para el Progreso de la Dirección como Presidente de Gobierno –uno de los *lobby* de presión más influyentes en los ochenta– lanzaría un mensaje a favor de la necesidad del AI’83, de la “paz social” anunciando ante mil empresarios como a “partir de los Presupuestos Generales de 1983 podamos establecer un diálogo claro con los agentes sociales en toda la legislatura”. Intervenciones, según recogieron las crónicas correspondientes, fuertemente aplaudidas. Con su habitual inteligencia discursiva, hablaría de gobernar con “prudencia”, y a la par negaría que desde el Gobierno los socialistas pudieran llevar a cabo nacionalizaciones, para afirmar como “me siento más socialista que antes porque veo las desigualdades sociales que existen en España”⁵¹⁰.

Dicho encuentro sería calificado desde *El Socialista* como “clave para el acuerdo” en referencia al AI’83. Más aún pues, según la cronista laboral del órgano de expresión del PSOE –Sol Padillas– e producirían los siguientes hechos tras la intervención del mismo Presidente:

«La lección fue, al parecer bien entendida y encajada por la patronal, que, de inmediato, daba órdenes a sus negociadores para flexibilizar sus posiciones cerradas. Así en la octava y novena reunión negociadora, cuando todo parecía indicar que se estaba al borde la ruptura –ante la intransigencia de la patronal de no abrir su banda salarial, y sobre todo, en relacionarla con la jornada–, de repente se suavizaron las posiciones y unos y otros se pusieron a discutir en la voluntad de alcanzar un acuerdo que no escamotease las pretensiones de unos y otros»⁵¹¹.

Como adelantáramos, el mismo viernes 28 de enero, prácticamente a la misma hora estaba convocada la esperada séptima reunión oficial. Pero unas horas antes de la misma, la CEC de UGT se reunía, después más de quince días sin ningún encuentro. Un tiempo sin reuniones, sin duda, elevado pero que así ha quedado reflejado en su libro de actas. Con no pocos temas por tratar el encuentro duraría unas cuantas horas. Y, una vez más, no se tomaría ninguna decisión de relieve. Sin embargo, en la misma Nicolás Redondo mostraría su evidente preocupación por la “complejidad de las relaciones Partido-gobierno, Partido-UGT y Gobierno-UGT” tanto con respecto al programa socialista como a la negociación colectiva. Complejidad pero también recelos –hablar de *desconfianza* sería excesiva en aquel marco– que se concretaría en un listado de temas y una metodología de trabajo, para seguir con detenimiento las “acciones del Gobierno”⁵¹².

Así pues, por la tarde se celebraría el octavo encuentro del futuro AI’83. Y como había sucedido previamente, los negociadores demostrarían una capacidad de aguante sin igual. Así se encadenarían dos reuniones –la octava y la novena, respectivamente– de forma seguida, y que se prolongarían durante todo el fin de semana hasta el domingo. Largos encuentro de más de diez y doce horas que terminarían –como ya venía siendo habitual– a altas horas de la madrugada –el sábado a las 2.30h y el domingo a las 5.00h– y a través de las cuales se conseguiría, aparentemente, desbloquear el proceso según informaría la prensa. De cualquiera de las formas, y más allá de lo que se publicaría desde la prensa, a lo largo de aquel fin de semana, entre el 28 al 30 de enero, ninguno de los interlocutores afirmaría haber llegado a un acuerdo o ni siquiera a un preacuerdo.

Como en otras tantas ocasiones, tras las debidas presiones –públicas o secretas– el trance negociador parecería que se hubiera resuelto, a la postre, en cuestión de horas a la salida de aquellos interminables días. Sin duda, se estaba ante otro de los muchos *milagros* atribuibles

⁵¹⁰ Noticia, “El pacto es básico para proseguir el diálogo durante la legislatura con los agentes sociales, según Felipe González”, *El País*, 29 de enero de 1983.

⁵¹¹ PADILLA, Sol, “Por fin, acuerdo”, *El Socialista*, nº 295, (1983), p. 32.

⁵¹² AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 28.01.83”, sig. 002561-002.

al “modelo español de concertación social”. Elaborado un borrador, al que todavía se le daría no pocos retoques, la banda salarial se situaría para 1983 entre el 9,5% al 12,5%. Un punto medio entre los negociadores, pero dentro de las propias previsiones de la CEOE en una segunda fase. Eso sí, con un no pequeño triunfo por parte de la patronal –una vez más– al incluirse la posibilidad de descuelgue para las empresas en crisis y con pérdidas, así como una cláusula de revisión bastante moderado. En cualquier caso, el posible acuerdo seguía rodeado de “confusionismo”, debido a la clásica política de bloqueo informativo –denominada en aquella ocasión como “una deficiente transparencia informativa”–⁵¹³.

Pero las dificultades para alcanzar el acuerdo final continuarían en los días siguientes. Y de qué forma, cabría añadir. Como había sucedido en otras tantas ocasiones, se debatiría punto por punto, coma por coma y hasta los cambios ortográficos cuando no semánticos más pequeños. Así cuando todo parecía encaminado o cuando menos aclarado en el terreno de las cifras acordadas, continuarían las negociaciones. La causa: las dificultades por parte de cada una de las partes de llevar el primigenio borrador a sus respectivas direcciones y obtener una posición favorable, más aún tras las duras posiciones de partida adoptadas. Especialmente victimistas se mostraría la patronal, a través del presidente de su Comisión Negociadora, Diego de Pedroso, quien afirmaría como tal pacto rebasaba “los límites establecidos por nuestra junta directiva”, para, al mismo tiempo, *vender* el mismo como un ejemplo de “responsabilidad”. Más complicado parecían tenerlo los sindicatos, en donde directamente en la prensa no se descartaba una “rebelión de las bases”.

Presto *El País*, a pesar de la falta de confirmación definitiva de la firma del acuerdo, celebraría el Acuerdo Interconfederal en un editorial a “mayor gloria” del Ministro de Economía y de su *cuadro macroeconómico* presentado en los días previos. Tras felicitarle por la banda salarial alcanzada, que “no se traduce en una carga intolerable para las empresas y la demanda interior de bienes de consumo”, veía en aquel acuerdo otro *feliz* elemento al validarse “las previsiones gubernamentales”. Se *confirmaba*, pues, el “realismo de este compromiso en una época de dificultades económicas”. Reconocida la más que probable pérdida de poder adquisitivo, no obstante, también había que felicitarle por los “deseos de entendimiento de empresarios y trabajadores de vivir pacíficamente dentro del orden público y económico marcado por la Constitución”⁵¹⁴.

Asimismo, y en otro indisimulado gesto de optimismo por parte del Ejecutivo. el mismo, el lunes 31 de enero, se felicitaría igualmente por el AI’83, y eso, insistimos, en que no había nada acordado de forma definitiva. No sólo, pues, anunciaría su disposición a sentarse para discutir el futuro PEMP. Especialmente exultante se mostraría Almunia quien veía desinflarse un posible rebrote de la conflictividad⁵¹⁵.

No les sería fácil, en absoluto, a los representantes de la patronal y sindical presentar y vender el preacuerdo a sus respectivos órganos de dirección en la siguiente semana, entre el 1 al 7 de febrero. La reunión de la Junta Directiva de la CEOE para el martes 1 se preveía complicada y así fue. Con todo, los disciplinados empresarios darían su “sí”. Y como había sucedido previamente, lo que no faltarían, en adelante, sería los cantos a la responsabilidad y de los beneficios de mantener la política de concertación social⁵¹⁶. Desde la CEC de UGT el mismo martes 1, analizado y debatido “punto por punto” el borrador del AI’83, se acordaría convocar un Comité Confederal extraordinario, tal y como se había mandado en el anterior celebrado a finales de diciembre. Confiados en que no hubiera mayores sorpresas ni

⁵¹³ Noticia, Rodolfo Serrano, “Banda del 9,5% al 12,5% para las subidas salariales negociables en 1983”, *El País*, 30 de enero de 1983.

⁵¹⁴ Editorial, “El horizonte económico de 1983”, *El País*, 31 de enero de 1983.

⁵¹⁵ Noticia, “El Gobierno puede negociar un plan con patronal y sindicatos”, *El País*, 1 de febrero de 1983.

⁵¹⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE aprueba el principio de acuerdo para la negociación colectiva”, *El País*, 3 de febrero de 1983.

disensiones, en cualquier caso, la mayor de las preocupaciones giraba en cómo una vez conocidos los resultados de las elecciones se “podría ahora UGT transformarse en la Central hegemónica de este país”, para lo que se acordaba celebrar una reunión monográfica y un documento base⁵¹⁷. Por lo demás, en el siguiente editorial de *Unión* tras resaltar la “postura responsable y flexible” adoptada por UGT, y como sucedería en las respectivas reuniones de sus órganos de dirección, ni una sola palabra se diría de la desaparición de la cláusula de eficacia general⁵¹⁸.

Las mayores dudas, pues, se cernían sobre Comisiones Obreras nuevamente. En todo a lo largo de este mismo proceso, CCOO no se había retirado de las negociaciones tras la experiencia del AMI. Ahora bien, ¿qué sucedería? A diferencia de las siempre amables y limitadas crónicas con respecto a la patronal y la UGT, la decisión y discusiones de CCOO trascenderían plenamente a los medios. Reunido su Consejo Confederal el miércoles 2 y el jueves 3 de febrero, se aprobaría, finalmente, apoyar el AI’83, aunque no faltaría duros enfrentamientos, principalmente por parte de la CONC tras la celebración de una asamblea en Barcelona –aquel mismo día– con más de dos mil delegados quienes votarían en contra de firma el acuerdo interconfederal⁵¹⁹. Solventado el difícil trago para la dirección de Comisiones Obreras, se procedería a la redacción de un comunicado que cargaría duramente contra la patronal y la política económica del Ejecutivo, a la que se consideraba como “débil” frente a las pretensiones de la propia CEOE⁵²⁰.

Mientras tanto, y a la espera de la reunión del CC extraordinario de UGT, las negociaciones continuarían a su ritmo. Cuando nadie esperaba mayores sorpresas a punto estarían las mismas de romperse. En la décima reunión oficial que comenzaría el viernes 4 y terminaría a las 8.20 del sábado 5, tras más de dieciocho horas en un nuevo record –aunque lejano a las 36 horas que duraría la última reunión del ANE– CCOO presionaría, punto por punto, todos los acuerdos. Una estrategia motivada por las fuertes intensiones internas y las divisiones en torno a la conveniencia de firmar el ANE tras la reunión de su CS. No tardaría la prensa en calificar tal forma de proceder como de “actitud obstruccionista” en relación a lo que consideraban “cuestiones de puro matiz semántico o de estilo”. Cuestiones que, al parecer, iban más allá al conseguir arrancar las propias Comisiones Obreras que se eliminara el párrafo concreto destinado a dotar al AI’83 de eficacia general. Un pequeño triunfo de este sindicato, que le permitía tener las manos libres de cara a negociar convenio por convenio, y así como un pequeño retroceso de UGT y CEOE, quienes terminarían cediendo sabiendo de las presiones y necesidad de solventar ese trámite⁵²¹.

⁵¹⁷ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 01.02.83”, sig. 002561-002.

⁵¹⁸ Editorial, “Un preacuerdo importante”, *Unión*, nº 36, (1983), p. 2.

⁵¹⁹ AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión del Consejo Confederal extraordinario de los 2/3-II-1983”, Madrid, sig. 2-01. Véase el “Informe-Propuesta de la C. Ejecutiva”. No mucho tiempo después el líder de CCOO, Agustín Moreno, realizaría la siguiente valoración: «CCOO era consciente de que el AI era un acuerdo incompleto, por la inexistencia de negociaciones globales con el Gobierno sobre la creación de empleo, la protección social, etc., pero lo asumió como el acuerdo posible dadas las circunstancias y pensando en que el desarrollo de los convenios iba a exigir la unidad de los trabajadores ante la previsible dureza patronal. Y sobre todo, por el compromiso explícito del gobierno en aquellas fechas de abrir una ‘segunda mesa’ para los temas de política económica, en especial del empleo, donde los trabajadores podríamos obtener las contrapartidas fundamentales». MORENO, Agustín, “Prólogo” en COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos...*, op.cit., p. 24.

⁵²⁰ Noticia, “El consejo confederal de CCOO asume el acuerdo inteconfederal entre patronal y sindicatos”, *El País*, 4 de febrero de 1983.

⁵²¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El acuerdo interconfederal estuvo ayer a punto de no firmarse”, *El País*, 6 de febrero de 1983.

Tras el *susto* del fin de semana pasado, el lunes siete se reunía, por fin, el Comité Confederal de UGT a las 10.30 en la sede la Unión Provincial de Madrid con 114 “compañeros” y “compañeras” presentes. Una vez repartido el borrador del AI, Nicolás Redondo abriría el mismo. Sabedor de las dificultades existentes, animaría, de entrada, a un “debate enriquecedor y fraternal de forma que la decisión final del mismo sea sumida sin tensiones por toda la Organización”. Con otro objetivo: “manteniendo la imagen unitaria y solida que ha conseguido el espectacular crecimiento logrado por la UGT en los últimos años”.

Tras calificar la negociación de “compleja”, “difícil” y “más dura en que otras ocasiones”, se insistiría en su comportamiento exclusivamente sindical⁵²². Criticada la CEOE por su forma de afrontar la misma y crítica duramente CCOO por haber intentado “ir a una negociación abierta con movilización”⁵²³, se denunciaba las fuertes presiones contra el Gobierno socialista –a través de un insólita y desconocida “pinza” entre AP y el PCE–. Presentado ese *gris* panorama y defendida su postura de responsabilidad, se hablaría de cómo el AI’83 es un “acuerdo de mínimos, positivo, fruto de una negociación compleja, no habitual hasta la fecha y donde no había contrapartidas”. También intervendrían los principales negociadores –Zufiaur y Corcuera, entre otros–. De las intervenciones de otros *compañeros* como Justo Fernández, Manuel Fernández, Jesús Pérez simplemente se desconoce su contenido. Llegada la votación no saltaría ninguna sorpresa. Pero que hubiera 7 votos en contra y 9 abstenciones sobre 95 votos a favor, suponía un inédito 15,2% de votos en negativo. Un dato, prácticamente, inédito que reflejaría un hondo malestar en buena parte de la UGT, y ello en una organización acostumbrada, en la práctica, a aprobar tales decisiones por unanimidad. Redondo, finalmente, cerraría aquella reunión con un discurso centrado en la *unidad* de la UGT, afirmando como el AI’83 es un “acuerdo perfectamente defendible”⁵²⁴.

Por su parte, y tras la última maratoniada reunión de la comisión negociadora, CCOO volvería a convocar un nuevo CS el 12 de febrero. De cara a evitar mayores tensiones dentro de la organización, se procedería previamente a realizar “una amplia consulta entre los trabajadores”, en donde participarían “millares de delegados de todo el país [...] Setenta y dos órganos de dirección territoriales y setenta y un órganos de rama”. En un claro ejercicio de democracia interna –la primera vez que se realizaba el mismo, como recordaría el propio

⁵²² La dureza con la que se desarrolló la negociación sería resaltada por todos y cada uno de los participantes. Véase el relato de, Entrevista, “Matilde Fernández”, *Unión*, nº 36, (1983), p. 8, quien afirmaría: «La negociación ha sido la más dura que yo conozco, y en el fondo, porque los empresarios no estaban en una posición de jugar a empresarios, y por lo tanto, a hacer el marco de relaciones laborales, sino que estaban jugando a políticos y buscaban de forma solapada hacer claudicar el programa socialista».

⁵²³ De esta forma se describía el complicado nivel de relaciones entre UGT y CCOO en un *editorial* del órgano de expresión de la Ejecutiva socialista: «Para que la negociación colectiva se desenvuelva dentro del mejor nivel de entendimiento posible entre UGT y CCOO, es importante que ambas centrales sindicales mantengan una línea de acción sindical lo más coordinada posible. Ya CCOO está llevando a cabo acciones contradictorias hostigadoras del actual Gobierno al convocar movilizaciones como la de la siderurgia integral, y firmando, por otro lado, acuerdos como el AI-83 con un claro carácter de paz y concertación social. UGT piensa negociar los convenios por empresa, sector por sector, abriendo las puertas a la acción sindical, lo que no quiere decir que vaya a dejarse arrastrar por planteamientos políticos que no tienen nada que ver con el AI-83». Editorial, “Un acuerdo positivo”, *Unión*, nº 2, (1983), p. 2. En aquel mismo número al respecto de la citada huelga en el sector de la siderurgia véase la noticia: “Una huelga gratuita” (p. 3).

⁵²⁴ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Organización, “Acta del Comité Confederal extraordinario del 7 de febrero de 1983”, Madrid, sig. 002605-007. Asimismo debe tenerse presente un detalle no menor y que se reflejaría en la citada acta. Cuando todavía no se conocía –o al menos, no se había hecho público– el acuerdo entre UGT y el Gobierno para alargar dos años el mandato de los delegados sindicales –en una de las contrapartidas más claras como evidentes que obtendría la central socialista por éste y otros acuerdos– se afirmaría lo siguiente: «Esto hace que los próximos cuatro años puedan decantar a la UGT, como la central hegemónica, en torno a la cual se produzca la unidad de la clase trabajadora española, teniendo el reto de ganar la batalla en el sector servicios a los sindicatos independientes».

Camacho—, y pese a que Uniones Locales como Barcelona y Murcia votarían, no, finalmente saldría adelante la decisión de firmar el AI'83⁵²⁵. Igualmente se aprobaría una *resolución* en donde se advertía que, en adelante, el “conjunto de CCOO [estaría] orientada a conseguir la aplicación y desarrollo más positivo posible del Acuerdo Interconfederal en los convenios colectivos”⁵²⁶. De esta forma, la dirección de Comisiones Obreras salvaba un potencial problema que se le había presentado tanto en el AMI como en el ANE, y ello a través de cientos de asambleas de trabajadores y delegados.

Superada, pues, la última prueba y obstáculo se anunciaría como el día 15 de febrero se firmaría el AES. Llegaba la hora de la representación iconográfica. A saber, de los éxitos de la concertación social y, claro está, de la *paz social*⁵²⁷. Ni las formas mínimas se respetarían. Ni menos, se menos se evitarían toda una serie de consecuencias previsibles e imprevisibles. Si, por un lado, Gobierno y patronal se garantizaban cierta tranquilidad en los siguientes meses, el dramatismo y la expectación que concitarían las negociaciones del propio Acuerdo Interconfederal para 1983, serían excesivas para sus resultados finales⁵²⁸.

Ahora bien, las consecuencias más relevantes de todos aquellos meses de negociaciones públicas, privadas, semi-oficiales, semi-privadas... sería el fin de la siempre débil *unidad de acción* entre CCOO y UGT. Conocidos finalmente los resultados de las elecciones de UGT – 36,7% UGT con 51.672 delegados, y 33,4% con 47.016 delegados de CCOO⁵²⁹— las discrepancias entre ambas centrales sindicales estallarían definitivamente. Tensionada en extremo y presionada al máximo para firmar, desde Comisiones Obreras se acusaría directamente a UGT de *gubernamentalización* y al Gobierno de *ugetización*, más tras conocerse la decisión del IMAC sobre el “cómputo de las elecciones sindicales”⁵³⁰. Aunque entonces se negaría, por activa o por pasiva, que entre ambas centrales existieran diferencias notables, la realidad era bien otra, y se venía *cocinando* desde las direcciones desde hacía semanas.

Apoyada y refrendadas las decisiones de la CEC de UGT por su CC, y ganadas por primera vez las elecciones sindicales, se volcaría en lucha por la conquista de la hegemonía sindical, sabiendo que contaba con el apoyo del Ejecutivo para tal empresa. Una lucha por la hegemonía que pasaba, primero, por diferenciarse de CCOO, y segundo, por cuestionar su estrategia de “hostigamiento al Gobierno”, y de su “excesiva politización y partidismo”, que estaba conllevando fuertes y permanentes movilizaciones contra la política económica de los socialistas. Un deterioro que ni siquiera podría tapar el apretón de manos entre Redondo y Camacho con la firma del AI'83 el martes 15 de febrero. Tampoco ayudarían determinados gestos –siempre tan importantes en la política—. Por ejemplo, el siguiente: como UGT, junto con la CEOE, se negarían a sentarse de forma conjunta con CCOO en la rueda de previa a la citada firma del AI'83. O, por ejemplo, también que Redondo afirmara en la misma que los

⁵²⁵ “El Consejo Confederal aprueba el Acuerdo Interconfederal”, *Gaceta Sindical*, nº 24, (1983), p. 6.

⁵²⁶ AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión extraordinaria del Consejo Confederal del día 12-II-1983”, Madrid, sig. 2-02. En donde se incluye, “Resolución del Consejo Confederal de CCOO”.

⁵²⁷ Noticia, “El Acuerdo Interconfederal se firma oficialmente mañana”, *El País*, 14 de febrero de 1983. Un amplio reportaje gráfico se puede encontrar en: “El AI-83, a punto”, *Unión*, nº 2, (1983), p. 9.

⁵²⁸ Sobre sus contenidos y consecuencias nos remitimos al análisis realizado en su día por, MULAS GARCÍA, Alejandro, “Los Pactos sociales españoles. De La Moncloa al Acuerdo Interconfederal/83. A modo de introducción histórica al AI/83”, *Documentación Social*, nº 7, (1983), pp. 95-12.

⁵²⁹ Nos remitimos a la *nota 196*.

⁵³⁰ Noticia, “Camacho, a favor de un referéndum antes de firmar el Acuerdo Interconfederal”, *El País*, 15 de febrero de 1983

empresarios son los que más habían cedido⁵³¹. La siempre excelsa representación de los *logros* de la concertación social fallaban en uno de sus elementos fundamentales: la escenificación las virtudes de cada acuerdo alcanzado⁵³².

Las mutuas desconfianzas a tres bandas pronto tendrían su consiguiente reflejo en la ruptura de relaciones entre CCOO y UGT, y en un endurecimiento de la negociación colectiva, que evidenciaba lo débil que había nacido el sufrido Acuerdo Interconfederal de 1983. Sin haberse evitado el riesgo de una potencial oleada de conflictividad, no obstante, el Ejecutivo encontraría la rápida colaboración con la UGT, quien antes de firmar el propio AI'83 en su reunión del 8 de febrero elaboraría toda estrategia para frenar la misma en caso de darse –lo que entonces se denominarían como “puntos «calientes»”– para lo cual se “establecerá paralelamente una estrategia de conversaciones y tratamiento de Industria y Trabajo”⁵³³.

Publicado el AI'83 el día 1 de marzo en el BOE⁵³⁴, establecía su *naturaleza jurídica* en base al Título III del ET, y tenía un ámbito de aplicación temporal hasta el 31 de diciembre de 1981, “salvo lo pactado en materia de jornada laboral, que producirá efectos durante el período específicamente estipulado en esta materia”. En su Capítulo III, *Salarios* se reflejaría los acuerdos adoptados, a partir de cuales se terminaría estableciendo una banda salarial del 9,5% al 12,5%, con todas las salvedades y excepciones que se han venido anunciado, empezando por su no “necesaria y obligada aplicación para aquellas Empresas que acrediten, objetiva y fehacientemente, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios contables de 1981 y 1982”. De hecho, se copiarían en aquella ocasión párrafos enteros del ANE o de otros acuerdos al respecto. Por lo demás, en el artículo 4 dedicado a la cláusula de revisión salarial, estaba quedaba fijada de la siguiente manera: “En el caso de que el Índice de precios al consumo (IPC) [...] registrarse el 30 de septiembre de 1983 un incremento respecto al 31 de diciembre de 1982 superior al 9 por 100 se efectuará una revisión salarial”. La otra gran novedad se reflejaría en el Capítulo IV, *Jornada Laboral*, en donde se establecería ya como la “jornada semanal de cuarenta horas será de 1.826 horas y 27 minutos de trabajo efectivo a establecer a través de la negociación colectiva”. Un párrafo que tantas batallas y disgustos había ocasionado, y que otros tantos *disgustos* daría en no pocos meses.

En términos generales, el resto de los capítulos volvían a semejarse a anteriores acuerdos. No obstante, es conveniente detenerse en el Capítulo VI, *Medidas relacionadas con el fomento del empleo*. Tras detallar en su artículo 12 las correspondientes medidas relacionadas con el sistema especial de jubilaciones pactadas en Convenio, en el artículo 13 dedicado a horas extraordinarias, se continuaría con la habitual línea de “supresión de las horas extraordinarias habituales”, para a continuación introducir el siguiente párrafo:

«Asimismo en función de dar todo su valor al criterio anterior se recomienda que en cada Empresa se analice conjuntamente entre los representantes de los trabajadores y la Empresa la posibilidad de realizar nuevas contrataciones, dentro de las modalidades de contratación vigentes, en sustitución de las horas suprimidas».

Una recomendación con escaso peso práctico a la hora de la verdad como sucedería, sin ir más lejos, con el pluriempleo –artículo 14 del AI'83– pero que introducía la posibilidad de mantener las mismas “por pedidos imprevistos o períodos punta” entre otros factores, siempre que “no puedan ser sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de contratación previstas legalmente”. Y aunque no aparecía recogido literalmente, se abría una puerta –teórica,

⁵³¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Se agudizan las diferencias entre CCOO y UGT”, *El País*, 16 de febrero de 1983.

⁵³² Véase al respecto: Noticia, Rodolfo Serrano, “Patronales y sindicatos aseguran la aplicación del Acuerdo interconfederal de negociación colectiva”, *El País*, 18 de febrero de 1983.

⁵³³ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 08.02.83”, sig. 002561-002.

⁵³⁴ Resolución del 17 de febrero de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena registro y publicación del texto del Acuerdo Interconfederal 1983 [B.O.E. 1 de marzo de 1983].

insistimos— para que los empresarios contrataran por la vía temporal. Un detalle no menor que cobraría su importancia en los siguientes meses.

Con o sin acuerdo, el futurible escenario de actuación de los ejecutivos socialistas en materia económica y laboral aparecía repleto de incógnitas e interrogantes. En cierta parte, sus previsiones iniciales se vendrían debajo. La primera prueba de la concertación social se sacaría adelante, pero con un *aprobado raso*. Asegurado el apoyo estratégico de UGT, quien había dado sobradas muestras de confiabilidad como se evidenciaría al aparecer como un “interlocutor capaz de racionalizar los conflictos sociales”⁵³⁵; y asegurado también cierto margen de actuación con la patronal, la posible reacción de Comisiones Obreras empezaría a preocupar, y mucho, al Ejecutivo socialista. Debilitadas las fuerzas políticas con representación parlamentaria tras las elecciones de octubre de 1982, el principal contrincante opositor del propio Ejecutivo, CCOO, iría evidenciándose como un digno opositor en los siguientes meses.

No han pasado ni tres meses desde su llegada a La Moncloa, y ya habían comprobado que en el terreno de lo social y sindical, la batalla no estaba ni muchos menos ganada, y eso que su proyecto de modernización socialista no había comenzando ni siquiera a andar. La legitimidad política, por tanto, alcanzada en las urnas se evidenciaría precaria muy pronto en el terreno laboral. Un “principio de realidad” que tendría un largo proceso de digestión ante las nuevas y más duras *pruebas* a afrontar por la *nueva coalición de poder* frente al mundo del trabajo.

⁵³⁵ VEGA, Rubén, *La reconstrucción del..., op.cit.*, p. 132.

10. Historia e intrahistoria de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 (marzo/mayo 1983-febrero 1984)

10.1. Razones de un estudio

Matizadas no pocas cuestiones de alcance con respecto al ordenamiento jurídico-laboral español, se pretende recorrer en este décimo apartado uno de los pilares centrales de la investigación. A saber: la historia de una reforma laboral, la del Estatuto de los Trabajadores de 1984.

Aunque la pregunta lógica a formularse a continuación sería sobre el porqué de su importancia histórica, quizás sea más conveniente, antes, interrogarnos por el desinterés que ha suscitado esta reforma laboral dentro del campo histórico. De entrada, dos respuestas podrían ofrecerse: primero, el clásico argumento sobre la cercanía a los hechos, seguido por el problema con las fuentes primarias. Una tercera razón podría también apuntarse: la hoy predominante *actitud metodológica* de no pocos investigadores en relación a este tipo de cuestiones. En cuarto lugar, no se puede dejar de mencionar algo consustancial a lo que aquí dicho: la crisis institucional/académica de la historia interesada en el movimiento obrero, que hoy prácticamente absorbida entre la historia de los movimientos sociales y la historia sociocultural, sigue confiándolo todo –en gran medida– en un exclusivo enfoque de las organizaciones obreras, siendo cada vez menos historia social y más una historia política¹.

Y, por último, esta historia que aquí se está proponiendo no contiene los característicos elementos de heroicidad, de clandestinidad, de victorias/derrotas tan apegados al devenir del movimiento obrero antifranquista. Pues la posible historia del movimiento obrero durante los años de la década de la modernización socialista, se guía por caminos menos atrayentes, en tanto la misma se encuentra marcada ya no sólo por la concertación social, la negociación colectiva o la institucionalización de los grandes sindicatos, sino por la suma de un conjunto de “retrocesos” cuando no “derrotas” hasta la crisis orgánica y de representatividad real dentro de la clase trabajadora. A lo que se añade, la transformación de la considerada como tradicional clase obrera, que después de su proceso de desfragmentación interna y sus problemas de definición, ha perdido su tradicional atractivo simbólico e identitario².

El conjunto de razones de este evidente desinterés no terminan ahí. A pesar de que desde otros campos del conocimiento se le ha prestado una mayor atención³, en verdad, es que la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984, en términos generales, ha quedado en un plano secundario en el campo de lo histórico en sentido estricto. Así en este mismo terreno, ha de diferenciarse dos cuestiones radicalmente diferentes: por un lado, los *efectos* jurídicos-normativos junto a su impacto a nivel socioeconómico, y, por otro lado, lo que sería todo su proceso negociador hasta su aprobación en el BOE. Si sobre el primer aspecto existe una muy considerable bibliografía interdisciplinar, que, prácticamente, abarcada todas las cuestiones al respecto; sin embargo, sobre el segundo asunto apuntado se encuentran referencias ya no sólo centrales sino secundarias. Hasta tal punto, que se podría afirmar que se trata de un tema que no ha ocupado, en ningún momento, parte de la agenda investigadora de los historiadores, más allá de vagas referencias. No sólo ha sucedido, de forma exclusiva, con la RET’84, sino con todos y cada una de las reformas laborales así como los procesos de concertación social de la historia

¹ Nos remitimos aquí al apartado “3.1. Un pequeño-gran debate por explorar: *ortodoxos* y *heterodoxos* en busca del sentido de lo social”.

² Véanse los argumentos mantenidos en su día en: GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*; y en, id., “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*,

³ Nos remitimos a lo apuntado en el apartado “2.2.2. El Derecho del Trabajo y los economistas «laboralistas»”.

contemporánea de España postfranquista. Y es, precisamente, sobre esta cuestión sobre la que centraremos nuestra atención.

Pero también ha de esbozarse otras razones más complejas para explicar la *relativa invisibilidad* de la RET'84. Primero, por la notabilidad que llegaría a alcanzar la reforma laboral de 1994, considerada mayoritariamente por todos los expertos en Derecho del Trabajo como la más relevante junto con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980. En segundo lugar, en nada ha favorecido su acercamiento el carácter prácticamente secreto de las negociaciones que llevarían a cabo entre el Ministerio de Trabajo y la UGT. Tampoco ayudó en su momento en que dicha reforma quedara, en gran medida, mediatizada por la posterior negociación del AES, tal y como se reflejaría posteriormente en su desarrollo reglamentario. Asimismo, la citada reforma se vería diluida en su presente histórico ante la intensa actividad legisladora, que caracterizaría a la primera legislatura socialista, en donde se aprobarían multitud de normativas relacionadas con el mundo del trabajo.

Sin embargo, existen un conjunto de poderosas razones para tratar de resituar la centralidad de esta reforma laboral, tanto en el campo estrictamente de las modificaciones legislativas como en relación a su impacto económico-social, político y cultural. Así pues, cabe señalar, en primer lugar, que hasta el momento ninguna otra reforma laboral ha disfrutado de tanta estabilidad (1984-1992/1994) y, por tanto, mayor impacto en el terreno de las prácticas empresariales de contratación. No es baladí lo anterior, pues los cambios legislativos en este campo no han aguantado, por regla general, ni un lustro. Lo que, a su vez, nos lleva a una segunda razón para explicar su posible interés como elemento de análisis histórico. Junto con el impacto en el campo estrictamente normativo, la “longevidad” de la RET'84 llevaría aparejada dos cuestiones de extraordinaria importancia. La primera, su sobresaliente huella en la modificación a corto plazo de la correlación de fuerzas capital-trabajo; y en segundo lugar, por su carácter simbólico-psicológico. O mejor dicho, por la extensión de un conjunto de *usos y prácticas* que sobrellevaría la extensión y la universalización de la contratación temporal por parte de los empresarios, modificándose no pocos comportamientos anteriores. Se asiste, de esta forma, a un cambio en las reglas básicas de la contratación, lo que, en breve, dará lugar al nacimiento de la conocida “cultura de la temporalidad”. A pesar de que no se toca ni el mecanismos de salida –el despido– ni las reglas de la negociación colectiva, tal y como sucedería con la reforma de diez años después; en lo que respecta a las relaciones individuales de trabajo, es a partir de la Ley 32/1984 cuando se normaliza jurídicamente la continuada precarización del mercado de trabajo.

Dicho esto, los efectos directos de esta reforma generarán en muy poco tiempo un vuelco en el devenir histórico, tanto a nivel legislativo laboral como en lo relativo a la composición de la fuerza de trabajo. Primero, por el espectacular salto que conlleva la extensión continuada de la temporalidad –y con ella una multitud de fenómenos asociados como por ejemplo la sustitución de trabajadores fijos por temporales– hasta alcanzar tasas desconocidas del 30% al 35%. Hasta tal punto de considerarse tal fenómeno como un problema de primer orden político y socioeconómico a finales de los ochenta y con especial intensidad en los primeros noventa. Con un punto añadido de sobresaliente interés: en ningún momento ni la reforma serviría para solucionar el problema del desempleo –cuando no lo agravaría– a la par que introduciría elementos notablemente perniciosos para el propio buen funcionamiento del mercado de trabajo. Pero es que además, la RET'84 está detrás directamente de la modificación interna y generacional de la clase trabajadora, que, o bien, se había insertado en el mercado de trabajo durante los setenta y setenta, o bien, entraría durante estos años tras largas situaciones de bloqueo y de desánimo generalizado. *Generación* que asistirá a un cambio radical en los mecanismos de entrada, permanencia y salida del mercado y que rompería con el modelo biográfico laboral anterior. Y con ser todo lo anterior de notable relevancia, a medio plazo, esta reforma también influirá profundamente en las estrategias políticas y organizativas de los

sindicatos ante un mercado cada vez más dualizado, tal y como sucedería durante los meses que antecedieron a la convocatoria del 14-D⁴.

Dos poderosos argumentos también vienen a completar y a avalar el estudio de esta normativa. Se continúa a través de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984, el periodo de constantes reformas siempre en un sentido más flexibilizador/liberalizador. Eso sí, con una intensidad nunca antes conocida ni prevista, y en donde la *piedra de toque* va a ser la merma constante de los derechos reales y efectivos de los trabajadores. El *punto de no retorno* en el terreno de la estabilidad laboral y de la causalidad jurídica encuentra aquí su fundamental punto de inflexión. La segunda razón, es que este fenómeno de largo alcance no se producirá con un gobierno conservador o derechista, sino con uno socialista.

Cerrada definitivamente la transición socio-laboral, los posteriores intentos de reforma laboral como, por ejemplo, el famoso *Plan de Empleo Juvenil*, daría lugar a la revitalización de un ciclo conflictivo obrero hasta desencadenar la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Aunque en relación a la Ley 32/1984 por diversas razones que examinaremos, no se llevarían a cabo grandes movilizaciones, la *batalla* contra los posteriores y reiterados intentos gubernamentales de avanzar en línea con una mayor flexibilización del mercado de trabajo – interpretada siempre desde los sindicatos como un recorte de derechos laborales y de generación de una mayor precariedad– generarían los mayores conflictos políticos y sociales de la década de estudio.

Conflictos que, en todo caso, venían precedidos por numerosas movilizaciones –con escasa éxito en su mayor parte– desde la elaboración del Estatuto de los Trabajadores y todos los desarrollos legislativos en esta materia durante la década de los ochenta. Todavía más, el origen del AES –en relación, nos referimos, a la necesidad política de retomar la *senda* de la concertación social– es fruto de la respuesta gubernamental al muy conflictivo primer trimestre de 1984, en donde en tan sólo tres meses se perderán millones de jornadas de trabajo, situándose los niveles de conflictividad a un nivel similar a los tiempos de la transición.

Resumiendo. A pesar de su falta de visibilidad en su momento, del secundario interés despertado por parte de las ciencias sociales y jurídicas por su estudio –aunque aquí habría que introducir no pocos matices– y del evidente *abandono* desde la perspectiva histórica, nos encontramos con un elemento central de la estrategia de la modernización socialista sobre la que se articularán a corto, medio y largo plazo, las bases del cambio socioeconómico en sus diferentes niveles. El examen de la centralidad de la transmutación de las relaciones capital-trabajo es el que nos abre, en suma, el camino para interpretar adecuadamente este proceso de cambio. A buen seguro, por otro lado, su estudio en sí mismo no podrá inscribirse dentro de los grandes acontecimientos de este tiempo siempre leídos –como se ha advertido– en términos de *consenso*.

Pese a lo anterior, lo cierto, es que el estudio detenido de la RET'84 y del Acuerdo Económico Social, entre mayo de 1983 a diciembre de 1984, desde una perspectiva microhistórica, releva, en paralelo, las claves interpretativas de cómo se construyó –y des-construyó– el proceso de concertación social en España. Día por día, reunión por reunión, nombre por nombre... su seguimiento nos habla, en primer lugar, de la definitiva profesionalización del “modelo español de concertación social”. De hecho, tras alcanzar con el AES su aquí llamada *fase de desarrollo superior* el mismo iniciaría su lento declinar histórico.

Por lo demás, el ángulo de visión adoptado nos permite internarnos por otras tantas cuestiones –desde los enfrentamientos entre los principales sindicatos de clase del país, pasando por las maniobras clandestinas del Gobierno hasta la política chantajistas de la CEOE– que terminan visualizando las razones conocidas y desconocidas que están tras todo proceso negociador. Con una nota añadida: la *enorme* importancia histórica que han tenido este tipo de

⁴ Véase lo apuntado en el apartado “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el *único camino posible* de la economía política socialista?”.

procesos de cara a explicar la metamorfosis de las relaciones capital-trabajo. Una cuestión sobre la que ningún historiador y/o investigación histórica había llamado la atención hasta el momento.

No suele ser habitual que un trabajo de entidad histórica se detenga en tales cuestiones. La historia del movimiento obrero, la historia social de sus protagonistas, ha estado enfocada primordialmente a explorar y reconstruir la historia, las acciones y las victorias y derrotas de los sujetos históricos y sus organizaciones partidistas en un contexto concreto y determinado. Era, por tanto, el movimiento obrero el epicentro del relato, quien marcaba los ritmos y quien finalmente ocupaba el espacio central de la historia, *de su historia*.

Aquí el ángulo de enfoque es bien distinto: el camino de indagación nos lo proporcionarán los cambios en el sistema legislativo laboral, a partir de dónde iremos viendo las posiciones, actuaciones y movilizaciones de cada uno de los sujetos colectivos e históricos implicados. Pero no es ni pretende ser esta una historia de corte institucionalista. Ni menos se está una investigación, llamémosle por ejemplo, *clásica* en torno al movimiento obrero, repleta de aguerridos líderes o combativos militantes.

Siempre en esa perspectiva defendida a lo largo de la presente investigación, de ir hacia una *historia social desde abajo y con los de abajo*, nos interesa obligadamente otros tantos personajes histórico: desde los actores políticos –en donde el PSOE y el Gobierno socialista ocupan un lugar privilegiado– pasando, ¡cómo no!, por los propios trabajadores, en su vertiente grupal, de clase y también generacional, sin obviar a otros tantos movimientos sociales que escapan de la unicausal lógica obrerista tan típica. Esto obedece a un sin fin de razones. La primera, la más evidente, es que no se pretende reconstruir una historia del movimiento obrero al uso. Es decir, con ser relevante el tener presente las estrategias de las dos grandes organizaciones sindicales del país –CCOO y UGT– junto con las grandes centrales empresariales –CEOE y CEPYME– nuestro objetivo final descansa en el análisis de las repercusiones de los cambios de la modernización socialista en el cuerpo social. Y dentro de aquí en un colectivo concreto: la generación del *baby boom*. La segunda razón de peso, es no perder de vista al principal actor del estudio en una doble vertiente: el papel jugado por el socialismo –desde el Gobierno pero también desde el Partido– como promotor y actor legislativo de los cambios del marco de las relaciones laborales. Todo ello hasta convertirse en la *vanguardia española* de la flexibilización del SERL. Resulta, así pues, de notable utilidad, a nuestro juicio, abordar por vez primera un estudio detenido de la política laboral socialista en este doble sentido aquí expuesto.

La apuesta, nuestra apuesta, por una historia globalizadora, lógicamente no puede limitarse, de forma exclusiva, a la historia del movimiento obrero democrático, ni a la configuración del marco jurídico de las relaciones laborales ni a los procesos de concertación social, en tanto nos llevaría a un enfoque parcial de un proceso en el que la sociedad, el conjunto de la clase trabajadora principalmente, quedaría reducido a un mero constructo teórico y estadístico. Es decir, lo que aquí se está defendiendo, en primera y en última instancia, es el interés por los cambios por los que atraviesa la clase trabajadora/clase obrera como conjunto social, a partir de toda una secuencia de políticas en el orden económico, laboral y social.

Por estas mismas razones, el estudio de la historia de las reformas laborales, con la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 por delante, nos posibilita combinar todas estas perspectivas. Ciertamente, se dirá, que esta visión puede pecar de reduccionista, en tanto, y como se ha defendido antes, el impacto real de un cambio en las políticas de empleo es limitado⁵. Así es.

⁵ Véase lo apuntado a nivel teórico y metodológico tanto en la *Presentación* como en el apartado “2.1. Nuestros caminos de aproximación: interrogantes e hipótesis de trabajo”.

Ahora bien, en este trabajo no nos detendremos tan sólo en el examen de una parte concreta de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984. No. Se estudiará como un todo. Nos explicamos. Partiendo de sus antecedentes jurídicos nos aproximaremos a su origen, la negociación entre las partes, su desarrollo normativo hasta su aprobación, incluidos aquí su posterior desarrollo reglamentario. O dicho con otras palabras, más sencillas, más llanas, se procederá a historiar la historia de esta reforma laboral desde tres de los ángulos posibles, pero subsumidos en un mismo relato en nuestro afán por la siempre necesaria interdisciplinariedad: primero, desde el campo del análisis histórico de la propia negociación entre las partes pasando; segundo, desde el campo jurídico de cara a examinar el impacto de la RET'84 en la metamorfosis garantista del Derecho del Trabajo a través de su metamorfosis garantista; y en tercer lugar, nos centraremos en el impacto a corto, medio y largo plazo que esta reforma tendrá en el campo de las relaciones capital-trabajo.

Vaya también por delante que si escasos han sido los estudios históricos sobre la década del Gobierno socialista (1982-1992), menos han sido las investigaciones que se hayan interrogado no tanto por lo social sino por lo laboral, y que además hayan tenido la *voluntad* de transgredir las imágenes tipo mayoritarias⁶. Junto a las habituales causas esgrimidas para no internarse por tales aventuras cuando no las justificaciones para “externalizar” dicha temática a otras ciencias sociales, se ha argumentado, en alguna que otra ocasión, la inexistencia de fuentes documentales básicas para tal tarea. Esto encubre una parte de verdad y varias inexactitudes.

Evidentemente todavía falta un largo tiempo para acceder a la documentación de los Consejos de Ministros, de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos u otras tantas áreas de Presidencia del Gobierno. Asimismo lo anterior se podía circunscribir a lo relativo a los *papeles* del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio del Trabajo. Sin saber tampoco a ciencia exacta que llegará, que no llegará, dadas las habituales prácticas personalistas de considerar como propios los papeles que forman parte de la gestión de lo público. O cuando no, por la destrucción interesada de documentación. No faltan los casos ni los ejemplos como se explicó detalladamente en el apartado específico⁷.

Sin duda esta falta de “documentación oficial” merma las posibilidades investigadoras, al menos de cara a establecer los últimos detalles de cada uno de los pasos y decisiones, que estarían detrás de la reforma del Estatuto de los Trabajadores y del AES. Y decimos los últimos detalles ya que buena parte de esa misma documentación se ha podido localizar por muchas vías aunque sea de manera fragmentada: primero, a través del Archivo Histórico de la Fundación Largo Caballero; segundo, a través de documentación secundaria (monografías, artículos científicos...); y en tercer lugar a través de las propias memorias de no pocos protagonistas de aquellos años. Estos mismos “fragmentos” documentales con membrete del Gobierno, de los ministerios... que se han podido recuperar, plantean por sí mismos un amplio *corpus documental* que se puede rastrear y complementar con otra tanta documentación pública o privada.

Se decía al principio: lejos de una visión que pudiera interpretar la política económica y laboral de la estrategia de la modernización socialista como una gran conspiración política de grandes alturas, que hubiera venido a subvertir los principios ideológicos y las propuestas programáticas contenidas en el siempre citado programa electoral de 1982; los políticos socialistas, y muy concretamente el equipo económico del Gobierno, partieron de la firme e inalterada convicción de que aquella estrategia era la “única política posible”⁸. Todo ello a modo de *fe política*. O como teorizará José María Maravall: bajo el “síndrome NHA”. Lo que traducido en otros términos bien podría explicarse de la siguiente manera: más allá de las

⁶ Nos remitimos aquí al apartado “2.2.11. La historiografía académica y profesional: una *agenda investigadora* prácticamente por inaugurar”.

⁷ Véase el apartado “2.3. *Papeles* para una historia del tiempo vivido”.

⁸ Consúltense las tesis mantenidas en su momento en el apartado “6.1. Las condiciones objetivas vs subjetivas del trance modernizador”.

consignas partidistas, de las declaraciones a la prensa o de lo que se discutía o se dejaba de discutir en la CEF, en congresos socialistas y en otros tantos espacios... en el mismo momento en que se traspasa la *epidermis* del lenguaje político socialista –tanto del Partido como del Gobierno– a partir del año ochenta y dos, se puede visualizar las bases de lo que hemos denominado la “lógica liberal de la estrategia de modernización”.

Lo cual visto así, nos puede facilitar enormemente el manido problema de las fuentes. ¿Por qué? Sencillamente somos de la opinión que no existieron grandes programas secretos – esto no significa, quede claro, que no existieran proyectos más o menos “confidencial” que por su posible impacto no se dieran a conocer⁹. De hecho, un buen número de “documentos confidenciales” que se dan a conocer por vez primera en este trabajo, a luz que de lo que allí se narra tampoco puede afirmarse que supongan grandes *sorpresas* ni *sobresaltos* en lo hasta ahora conocido y en lo que se contará de nuevo. Se tratan de documentos de trabajo, con líneas orientativas y posturas más o menos duras o cerradas.

A todo lo anterior se viene a añadir lo siguiente: buena parte de las negociaciones secretas –o “privadas” o “confidenciales” como se encargarían de denominarlas los propios protagonistas tanto de la RET’84 como del AES, en lo que bien puede catalogarse como una *narrativa propia negociadora*– a través de las cuales se cerrarían los grandes acuerdos sociales e interconfederales, no serían a la postre tan secretas. Casi de inmediato la prensa –principalmente *El País* a través de sus habituales crónicas laborales cuando no desde *La Vanguardia*, *Diario 16* o *ABC*– darían a conocer el contenido fundamental de las mismas. No pocos casos se han expuesto ya con anterioridad. Y otro tanto sucedería en estos próximos capítulos: por ejemplo, a pesar del “pacto de silencio” al que se comprometerían los negociadores del AES –CEOE, UGT, y Gobierno, una vez excluida y marginada las CCOO– tal y como reconocerían posteriormente estos protagonistas, los acuerdos y desacuerdos serían en muchas ocasiones verbales en lo que se calificaría, con no pocas dosis de *sarcasmo* como *partidas de mus*. Ello cuando no se emplearía la comunicación telefónica. ¿Cómo rastrear, pues, los mismos? Libros tan empleados en esta tesis doctoral como el Mariano Guindal, *El secreto de los dioses*, precisamente, no abundan. Así pues, difícilmente se podrá descender hasta este nivel detalle en el futuro.

De cualquiera de formas, más pronto o más tarde, buena parte de los implicados darían su versión de lo sucedido –tanto en libros de memorias como en conferencias– con una concreción propia de detalles, a partir de los cuales se puede aventurar la reconstrucción parcial pero básica de los hechos. Lo que no evita afirmar que, a buen seguro, nunca se podrá reconstruir totalmente cada uno de los pasos negociadores. Tampoco, dicho esto, creemos que en caso de que fuera factible lo anterior, el posible relato e interpretación de los acontecimientos pudieran dar un vuelco total.

Así a través de la prensa, principalmente a gracias al diario *El País* y más concretamente a través del periodista Rodolfo Serrano, se pueden indagar estas conversaciones no *tan secretas*. Una información que se ha complementado –cuando se ha estimado oportuno– con las crónicas laborales de los anteriores medios de comunicación ya apuntados en el anterior párrafo. De esta forma, en el presente trabajo, se ha seguido, día a día, desde el 1/15 de marzo hasta finales del año 1984, toda la información económica-laboral y política acerca tanto de la RET’84 como del AES. Rodolfo Serrano junto con el también informador económico-laboral Gustavo Matías de *El País* entre otros, en sus numerosas noticias y reportajes aportan un cuadro realmente completo de por donde transcurrieron todas estas negociaciones. Sin duda alguna estamos ante dos de los informadores más cualificados para este campo. En muchos casos, se trata de informaciones generales que ciertamente poco o nada aportan, pero como sucede con los documentos históricos si se procede a seguir el rastro de pequeñas pistas, comentarios y datos sueltos, el retrato que se obtiene es, quizás, el más completo y con una profundidad de análisis que difiere en mucho de los documentos también oficiales de los propios sindicatos puesto.

⁹ Entre otros muchos ejemplos se podrían citar lo desarrollado en el Capítulo 7, *nota* 523.

No obstante, no se nos escapa –desde estas mismas líneas– la importancia histórica que tiene *El País* no sólo en las proximidades o directamente en el entorno socialista, sino como el principal soporte informativo de la nación desde la transición hasta nuestros días¹⁰. Por esta misma razón, se han tenido muy presentes sus *editoriales económicos*. Pero no sólo, pues, *El País* también jugaría un papel clave en este tiempo en la filtración –interesada en la inmensa mayoría de las ocasiones por motivos políticos antes que estrictamente “informativos”– de determinadas noticias, que, a la postre, modificarían –o ayudarían al menos– a *fixar* el rumbo de las negociaciones de la RET’84 y del AES. Sin olvidarnos, en este caso, de sus particulares campañas instigadoras contra Comisiones Obreras o el propio Marcelino Camacho. Estamos, por tanto, ante un actor tanto mediático como político de primer orden en el proceso negociador.

Tanto en el Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo como en el Archivo Histórico de la Fundación Francisco Largo Caballero están a disposición todas y cada una de las actas de los órganos ejecutivos de CCOO y UGT, respectivamente, a lo largo de estos años. La mayoría de ellas son actas o resúmenes de actas de sus diferentes órganos de dirección, como ya se ha dejado constatado. Y, ciertamente pocos, muy pocos, investigadores se han internado por tales “papeles” hasta el punto de que es complicado encontrar una publicación con tales referencias¹¹. No obstante, ahí están dichas actas que, una a una, nos van proporcionando una perspectiva globalizadora de los avances y retrocesos de la estrategia de los principales sindicatos mayoritarios. En este mismo espacio, ha de resaltarse por su alto valor histórico las actas de la CEC de UGT como tiempo tendremos de observar. A esto se añade que también se ha procedido a realizar un *vaciado documental* de los principales órganos de prensa de UGT y de CCOO: *Unión y Gaceta Sindical*.

En cualquier caso, la principal base argumental de documentación primaria de esta investigación se terminaría localizando en el AHFFLC y no precisamente en sus actas. Gracias a la vinculación entre UGT-PSOE-Gobierno socialista hasta al menos 1987 y 1988 –años en que acontece la *ruptura traumática de la familia socialista*– así como a la doble militancia de sus líderes y cuadros y sobre todo por una voluntad política decidida en materia de política archivística por parte de los diferentes directores de la Fundación Francisco Largo Caballero, se ha podido trasvasar la mera formalidad de las actas de las cúpulas directivas de la UGT, hasta la localización de documentación del PSOE y del propio Gobierno socialista. Mientras que en el Archivo Histórico de la Fundación Pablo Iglesias el material consultable se reduce en lo básico a la documentación “oficial” de los Congresos de la organización para el tiempo que transcurre entre 1982 a 1992, junto con la documentación oficial los Comités Federales (y no todos) así como los números correspondientes de *El Socialista* –lo que no es poca documentación en ningún caso–; en cambio, a través de las diferentes secretarías de la UGT –por ejemplo, la Secretaría de Acción Sindical, Secretaría de Acción Institucional o mismamente la Secretaría de Imagen– o a través de varios Departamentos –Juventud, principalmente– o través de Fondos Personales –por ejemplo, el Fondo Antón Saracíbar o el Fondo José María Zufiaur– se ha tenido acceso a una amplia y rica documentación: documentos del Ministerio de Trabajo, cartas personales y oficiales, notas de reuniones entre UGT con el PSOE o el Gobierno e inclusive papeles *oficiales-públicos* y no oficiosos de la CEOE. Precisamente, la principal laguna en la búsqueda documental, junto con lo que sucede con el Archivo Histórico de la Fundación Pablo Iglesias lo sigue constituyendo la política de acceso restringido de la CEOE, a excepción de sus *Boletines* de no fácil localización. No está toda la documentación que se manejó en aquel tiempo –estamos seguros– pero sí una considerable cantidad. Aunque en la mayoría de los casos no dejan de constituir “pequeños” fragmentos documentales, si se tiene la paciencia y la voluntad de sumar todos y cada uno de los papeles el cuadro, aunque incompleto, resulta

¹⁰ Véase, Capítulo 2, *nota 591 y nota 592*.

¹¹ Entre otros muy escasos ejemplos, véanse: SOTO CARMONA, Álvaro, “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)” en RUIZ, David (dir.), *Historia de Comisiones...*, *op.cit.*; VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, *op.cit.*. Y, por lo demás, véase lo apuntado en la *nota 6*.

bastante esclarecedor. Sucede aquí lo que pasa en muchas ocasiones dentro del *quehacer historiográfico*: rara es la vez que tiene la constancia plena de tener a disposición toda la documentación posible.

Llegados aquí la conclusión preliminar sería la siguiente: está a disposición del investigador un amplio *corpus documental*, a partir del cual poder reconstruir en sus trazas principales estos acontecimientos históricos. A lo que se añade, y no es menor, ya no sólo las memorias, las entrevistas en medios de comunicación de los protagonistas, sino cada un más amplio fondo de entrevistas orales que vienen a enriquecer notablemente el cuadro descripto¹². Pero no sólo, pues a excepción de unos aislados casos, los investigadores generalmente hemos tenido las puertas para entrevistar a los propios protagonistas vivos de aquellos tiempos.

A partir de aquí corresponde interrogarse por lo siguiente: es muy probable que en el futuro –más cercano o lejano– se podrán añadir datos, detalles y otros elementos de cara al análisis histórico. ¿Modificarán estos nuevos datos lo básico, lo central, de la interpretación que se proporcionarán en las siguientes páginas? No creemos a la luz de lo expuesto. Asimismo lo que bien pudieran parecer justificaciones no lo son. Sencillamente son constataciones acerca de que la labor del historiador es compleja, a la par que no tiene fin si la misma conlleva el empeño y la voluntad de acercarse lo más cerca posible a la realidad de su objeto de estudio.

10.2. Los alcances históricos, sociales y jurídicos de la Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984

«Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas».

Cita de autoridad discutida donde las haya en cuanto a su posible mentor –el debate está entre el poeta americano John Godfrey Saxe o el político alemán Otto von Bismarck– refleja, como ninguna otra reflexión que conozcamos, lo que sucede cuando se aplica el bisturí a la elaboración de una Ley. Algún ejemplo de las *leyes* y las *salchichas* ya se ha examinado con mayor o menor detalle. Y es, precisamente, lo que nos encontraremos cuando abordemos el estudio de la RET'84 y AES: conspiraciones, traiciones, secretismo con no pocos toques de miseria política. Con todo no se puede negar que tal estudio tenga su particular “encanto” o incluso puestos a la tarea su singular “atractivo”.

Como ya hemos visto desde los Pactos de la Moncloa pasando por el AMI, el ET, el ABI, el propio ANE o sin ir más lejos del AI'83, cada una de esas negociaciones estarían impregnadas de conspiraciones y más conspiraciones, hasta constituir los rasgos identitarios del proceso de concertación social. De nuevo, resulta que la suma de decenas, de cientos, de *pequeños detalles* se nos revela de una especial importancia de cara a la reconstrucción de toda una serie de episodios históricos interconectados.

Acercarnos al proceso de concertación social conlleva también internarnos por su propia iconografía, por sus ritos, por sus imágenes-fuerza así como por sus espacios públicos a la par que privados. Indiferentemente del lugar o del propio tiempo cronológico, todos y cada uno de los anteriores *pactos*, *acuerdos interconfederales* u de otra naturaleza jurídica, siguieron un ritmo y unas etapas similares: desde los primeros globos sondas por parte del Gobierno de turno, en donde este anunciaría la necesidad irrevocable de proceder a nuevas reformas del mercado de trabajo, siempre en un sentido más liberalizador-flexibilizador, y con no pocas dosis de populismo cuando no de radicalidad; para en una segunda fase, y tras las declaraciones de los denominados agentes sociales mostrando diferentes niveles de conformidad o de rechazo, se pasaría a alentar un calendario de negociaciones en donde la iniciativa de la agenda política correspondería al Ejecutivo –participara o no participara la Administración en los procesos negociadores– generalmente con el apoyo implícito de los empresarios; iniciada las

¹² Véase lo apuntado en la *nota* 7.

negociaciones –tercera etapa– daría lugar a encuentros-desencuentros permanentes en donde generalmente una de las partes –en nuestro caso las Comisiones Obreras– se retirarían de las negociaciones, mientras que las otras partes, tras rupturas, bloqueos y demás metáforas empleadas, irían cediendo y limitando sus aspiraciones hasta la concreción de un conjunto de acuerdos de mínimos. Todo ello, generalmente, acompañado de toda una serie de *rupturas totales, rupturas, bloqueos, suspensiones o enfriamiento* de las negociaciones en marcha.

Así se llegaría a la siempre tan deseada cuarta etapa. La fotografía de los firmantes como el primer final de una iconografía enmarcada bajo el rótulo de la *Paz Social*. No obstante, el cumplimiento o normalmente el incumplimiento de los grandes acuerdos sociales, rápidamente darían lugar a contundentes declaraciones repletas de reproches y lo que no es menos importante: la denuncia de acuerdos secretos generalmente vinculados a los aspectos centrados en la contratación temporal y a determinadas contraprestaciones económicas. En suma, se trata de la gran representación público-mediática del “modelo español de concertación social”.

En esta habitual iconografía de la reciente historia de España, sus principales protagonistas se han reducido, por regla general, a un pequeño número de políticos, de dirigentes sindicales y empresarios con sus respectivos asesores, hasta conformar una especie de “club” de la negociación de los que venían a depender las condiciones laborales de millones de trabajadores. Son, justamente, todo este conjunto de actores lo que nos interesan sobremanera en estas páginas.

Lo cierto es que cuando se profundiza en cada una de las diferentes negociaciones que se dieron hasta 1983, lejos de la aureola que las encubriría en ese fenómeno de la “concertación social” y las consabidas imágenes-fuerza, lo que se puede observar, por el contrario, es cierta banalidad en la forma y en el fondo. Y, con todo, no dejan de ser la mejor expresión de la correlación de fuerzas entre capital-trabajo en un tiempo dado, a la par que a través de estas mismas negociaciones se pueden interpretar claramente las estrategias gubernamentales, sindicales y empresariales como en ningún otro lugar.

Tanto la negociación del Estatuto de los Trabajadores como de forma específica la relativa al Acuerdo Económico y Social, cumplen todos y cada uno de los requisitos enunciados. Con una nota añadida: la definitiva profesionalización del proceso negociador en este caso.

En este estudio de caso se internará por todo este proceso negociador que se abre, en gran medida, entre marzo y mayo de 1983 y que se cierra meses después de la firma del AES a finales de diciembre de 1984. Con todo, se trata de fechas cronológicas extremas flexibles como se verá a continuación.

10.2.1. El momento de la toma decisión política: *la irrevocable necesidad de flexibilizar* (marzo/mayo 1983-agosto 1983)

«Para un joven es siempre mejor tener seis meses de trabajo que no llegar a tenerlo nunca».

Felipe GONZÁLEZ, el 14 de marzo de 1983, a los 100 días de ser nombrado Presidente de Gobierno.

«Lo que pasaba es que no se contrataba a ninguna persona sencillamente porque había psicosis de que había que ajustar, y en la medida de que vengan mal dadas no le puedo despedir y vuelvo a entrar en crisis. Por lo tanto, había que desencadenar la sangría desencadenando la contratación como fuera».

Álvaro ESPINA, Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1982-1985)¹³.

¹³ Declaraciones de Álvaro Espina a, CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, op.cit., p. 163.

Ni una semana pasaría, tras los espectaculares resultados conquistados por los socialistas en las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 8 de mayo de 1983, cuando el Gobierno socialista anunciaría su más que firme intención de, ahora sí, emprender la tantas veces frustrada modernización del país. Un anunció tras no más de cinco meses en el poder político, que a la par que ponía fin a ciertos titubeos en política económica, finiquitaba las ya muy escasas esperanzas de que se pudiera llevar a cabo una política socialdemócrata, que los propios socialistas habían desechado por activa y por pasiva en los meses previos¹⁴.

Nunca antes en la historia de España el conjunto de familia socialista, tanto a nivel político como a nivel sindical¹⁵, habían acumulado tales cuotas de poder¹⁶. Un éxito político que, en todo caso, se veía constreñido por la realidad económica de su tiempo. Principal factor de desestabilización política y social, junto con la persistente violencia terrorista de ETA, que durante los dos largos años siguientes concentraría las principales preocupaciones del Ejecutivo. Así pus, bajo el amplio y prácticamente intacto mandato electoral de la mayoría de la ciudadanía, el año 1983 marcaría un punto de inflexión en lo económico como en lo laboral.

En esta tesitura a mediados de mayo de 1983 se anunciaría a la puesta en marcha de un amplio programa de modernización para el conjunto económico del país. Nos volvemos a situar en los orígenes del futuro Programa Económico a Medio Plazo –todavía entonces denominado Plan Cuatrienal– junto con toda una serie de reformas legislativas *ad hoc*¹⁷. Según los plazos fijados por el propio Gobierno para mediados del mes de junio, se presentarían los primeros bocetos de los proyectos a llevar adelante, de cara a iniciar un proceso de concertación que tendría que estar concluido antes de septiembre de cara a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Revestido tales pretensiones reformistas de la mayor importancia posible, el periodista Carlos Gómez informaba desde las páginas de *El País* un 15 de mayo de 1983 como una futura “audiencia [a los agentes sociales por parte] del presidente trascenderá su propio significado y se convertirá en un llamamiento a la colaboración de todos en la superación de la crisis y en la modernización del país”¹⁸. Un llamamiento a la concertación social que como hemos visto y veremos formaba antes de la retórica política de los socialistas que de una verdadera voluntad política con posibilidades de materializarse. La razón: pues un posible acuerdo social en este primer año en el Gobierno no figuraría entre sus prioridades políticas. Tampoco se puede obviar los planes adelantados a la CEOE en lo que se convertiría, a la postre, en el pacto de “El Parrillón”¹⁹.

Los historiadores tienen por regla general cierto fetichismo con las fechas y las efemérides de cualquier signo. Una singular obsesión por la cronología, que suele conllevar la búsqueda, localización y certificación a partir de una fecha concreta de un nuevo periodo o de algún acontecimiento histórico singular. En nuestro caso, *buscar, localizar y certificar* el

¹⁴ Nos remitimos aquí al apartado “6.2. La «salida progresista» a la crisis”.

¹⁵ Véase lo apuntado en el Capítulo 9, *nota 196 y nota 390*.

¹⁶ Desde el medio de comunicación más apegado al Gobierno, no se dejaría pasar la oportunidad para remarcar lo siguiente: «El Gobierno goza de un respaldo popular apreciable y tiene asegurada holgada mayoría parlamentaria que le permiten exigir a los españoles las solidaridades necesarias para efectuar el inevitable ajuste de nuestra economía». Todo ello tras criticar que, «[p]ensar en la política monetaria como el único instrumento de corrección es, por supuesto, un modo de ir tirando». Editorial, “Reflexiones sobre nuestras perspectivas”, *El País*, 15 de mayo de 1983.

¹⁷ Entre otras: *reforma del sistema financiero, reforma fiscal, reconversión industrial, energía, turismo, reconversión agraria, transportes y comunicaciones...*

¹⁸ Noticia, Carlos Gómez, “Inminente anuncio de un programa de cambio y modernización de las estructuras económicas y sociales”, *El País*, 15 de mayo de 1983.

¹⁹ Nos remitimos aquí a lo apuntado en el apartado “6.2.1. Los tres pilares de la *lógica de la modernización socialista*”.

arranque del proyecto liberalizador/flexibilizador de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 resulta ciertamente complicado. No sólo por los problemas que se concentran en la posible determinación de su arranque inicial, sino a la hora de concretar qué documento o qué declaración oficial podría interpretarse como la fecha más remota a partir de la cual marcar el punto de arranque de la RET'84. Como el debate, en este caso concreto, poco o nada aporta de nuevo, en términos estrictamente históricos, a lo sumo podría indicarse que si una fecha pudiera determinarse esta sería, el anuncio institucional a mediados del año ochenta y tres, cuando se afirmaría desde el Ejecutivo “[e]ste debate [la reconversión industrial y el PEMP] estará ligado con temas de flexibilidad de mercado de trabajo, reforma de la Seguridad Social y asignación de recursos financieros”²⁰.

Pero antes de avanzar, lo cierto, es que desde el Gobierno socialista, con su Presidente a la cabeza, ya se había hablado en más de una ocasión de la necesidad de apostar por la flexibilización del mercado de trabajo por la vía contratación temporal. En realidad, y si nos ceñimos al campo de las declaraciones, antes que de los anuncios de futuras negociaciones, Felipe González dejaría bien claro en una intervención “conmemorativa” de sus primeros cien días en La Moncloa, como el programa socialista en materia de política de empleo se había quedado rápidamente anticuado²¹.

En medio de una creciente expectación política y mediática, ante las escasas apariciones de González Márquez en los medios de comunicación desde que era Presidente, realizaría una gran conferencia de prensa que despejaría no pocas cuestiones²². Con su habitual buena dote de orador, y tras desgranar los principales asuntos políticos, reconocería como los más grandes problemas para la nación se encontraban vinculados a la crisis económica. No faltaron en aquella cita las alarmantes cifras. Si en no pocos temas mantendría su siempre *ambigüedad calculada*, a la hora de hablar del problema del paro, sacaría a relucir una de sus principales *obsesiones* que le acompañarían hasta el final de su mandato, y que le terminaría por *costar* toda una huelga general: “Para un joven de veintiún años, sin empleo, tener la oportunidad de trabajar durante seis meses es mejor que seguir soportando una dependencia vejatoria del cabeza de la familia”²³. Y con palabras también medidas como era necesario “un paso de mayor audacia” en relación a incrementar la contratación temporal²⁴. En verdad, y si quiere rebuscar el posible origen de la *ofensiva flexibilizadora socialista* aquí encontraría su punto de origen en su vertiente discursiva.

²⁰ Noticia, Carlos Gómez, “Inminente anuncio de un programa de cambio y modernización de las estructuras económicas y sociales”, *El País*, 15 de mayo de 1983

²¹ Véase, Editorial, “Un estilo para una sociedad moderna”, *El Socialista*, nº 300, (1983), p. 7, en el número conmemorativo de los 100 primeros días de Gobierno. Un número, por cierto, en donde el PSOE y el Gobierno, en su conjunto, saldrían la ofensiva frente al evidente *acoso* de izquierda a derecha que, a su juicio, se estaba llevando a cabo: Noticia, “100 días de acoso” (pp. 8-9).

²² De hecho, y como declararía a mediados finales de febrero el propio Redondo «no sabemos de qué se trata esa planificación. Nosotros, en principio, lo que pedimos es que el gobierno lleve a cabo su programa y lo cumpla». Entrevista, “Nicolás Redondo”, *El Socialista*, nº 298, (1983), pp. 24-25.

²³ Aunque pueda ser leída como una *nota menor* o insignificante, en las páginas de *El Socialista* referente a las declaraciones de González de marzo no se recogerían, en ningún momento, tales palabras a pesar de su trascendencia: “El Gobierno más firme que nunca”, *El Socialista*, nº 302, (1983), pp. 10-11. Inclusive cuando se anunciaría los planes gubernamentales de dos meses después, se evitaría, nuevamente, referirse a tal cuestión. Así, por ejemplo, en el número 308 de *El Socialista* si bien se destacaría la intervención del Presidente en lo relacionado a su predisposición a negociar, no se dudaría en formar: «De mi parte no habrá nunca algo que pueda fragilizar la fortaleza de los sindicatos. Al contrario; mi máximo esfuerzo se centrará en fortalecer a los interlocutores válidos de los grupos que no tienen voz». “Realmente libre” y “Frenazo al desempleo”, ambos en *El Socialista*, nº 308, (1983), pp. 30-31 y 32, respectivamente.

²⁴ Noticia, Fernando Jáuregui, “El presidente admite la contratación temporal como posible fórmula para combatir el paro”, *El País*, 15 de marzo de 1983.

Si la sorpresa sería mayúscula para quienes todavía –como desde UGT– confiaban en que el Ejecutivo socialista mantuviera su *palabra* sobre lo acordado en el programa electoral *Por el Cambio*; mayor sería al día siguiente, el martes 15 de marzo, cuando el Ministro de Trabajo, reconfirmaba dichas intenciones en una conferencia de prensa. Por más que pretendiera tamizar el asunto, hablando de cómo el objetivo básico pasaba por “conseguir la total estabilidad en el empleo”, no se cerraba la posibilidad de modificar el RD 3887/1982. El argumento empleado por Almunia no podía ser de mayor peso, tras enumerar el tipo de contrataciones realizadas durante 1982, con clara tendencia por la contratación temporal: “Esto parece demostrar que los empresarios prefieren la fórmula de la contratación temporal a otras que, incluso, pueden resultarles más rentables”. Para rematar señalando, en una clara como burda manipulación, lo siguiente: “cuando la sociedad demanda este tipo de contratos sería ilógico rechazarlas por cuestiones ideológicas”.

Las reacciones no tardaron en producirse. UGT, en un todo un ejercicio de auto-control y confiando en que el asunto, por el momento, no iría a mayores aseguraría como las medidas propuestas podrían ser asumidas, siempre y cuando los sindicatos tuvieran un control sobre tal tipo de contrataciones, y que, por su parte, la Administración vigilará su posible uso fraudulento²⁵. En un tono radicalmente diferente se iba a expresar el Secretariado Confederal de CCOO en un comunicado el mismo día 15. Después de considerar como “preocupante que el presidente del Gobierno, al referirse al problema del paro, se haya limitado al estricto terreno de la flexibilidad y de unas mayores facilidades al empresario para la contratación temporal”; se pasaba revista a lo sucedido en los años anteriores. Para concluir, con la defensa de la negociación de su “plan de solidaridad nacional frente al paro y la crisis”, ya que “considera ineludible, la negociación de un plan integral de medidas de fomento del empleo, atendiendo a criterios más objetivos y racionales que los utilizados hasta el momento, en esta dirección”²⁶.

En términos generales, tal anuncio sería bienvenido por la patronal y la mayor parte de los medios de comunicación. Así *El País* felicitaba al señor Presidente por haber mostrado su predisposición política y estratégica a la hora de solucionar los problemas por “encima de los intereses ideológicos de partido”. Igualmente mostraba su no disimulado *entusiasmo* por la apuesta de González por la posible mayor flexibilización, que “puede ser bien recibida por los que buscan su primer empleo”, pese a que como advertiría el propio Presidente pudiera levantar “sin duda [...] ampollas”²⁷.

El primer órdago estaba, pues, lanzado y sin mayores contemplaciones. *Lanzado* el mismo, quedaría allanado el terreno para las futuras declaraciones políticas pero también para las decisiones político-técnicas. De este modo, hasta el citado anuncio gubernamental de aquel mes de mayo, no faltarían los movimientos y decisiones de todo tipo. Nos limitaremos a dos ejemplos entre otros posibles. Eso sí altamente significativos. Cuando desde la UGT ya se había tomado la decisión de no ir con CCOO a la celebración del 1º de Mayo, tras todo un tiempo en donde se habían intercambiado reproches, insultos y todo tipo de acusaciones²⁸; *Unión*

²⁵ Noticia, “El Gobierno, favorable a estudiar las nuevas medidas que favorezcan la contratación temporal”, *El País*, 16 de marzo de 1983.

²⁶ AHT, CCOO-SC, “Comunicado. El Secretariado Confederal de CCOO ante la flexibilidad de contratación anunciada por el presidente del Gobierno”, Madrid, 15 de marzo, sig. 004-005.

²⁷ Editorial, “Felipe González explica los cien días de gobierno”, *El País*, 15 de marzo de 1983. En línea similar se expresaría: Editorial, “La conferencia de prensa”, *ABC*, 15 de marzo de 1983.

²⁸ En el número 25 de *Gaceta Sindical* se publicaría las citadas cartas intercambiadas entre Camacho del día 25 de marzo y de Redondo Camacho del 29 de marzo. Así en la firmada por el Secretario General de CCOO, tras recordar los acuerdos de la Comisión Ejecutiva del día 22 de marzo, se terminaba realizando la siguiente propuesta: «Ni que decir tiene que estos grandes rasgos de lo que entendemos debería contener la conmemoración del 1º de Mayo, a exteriorizar mediante manifestaciones en toda España, son sólo una indicación de nuestro punto de vista, a discutir, conjuntamente con vosotros, ya que entendemos que UGT y CCOO deberíamos, en reunión conjunta de sendas delegaciones, examinar los contenidos finales del llamamiento unitario que creemos procede realizar ante esta efeméride, tal

publicaría una relevante entrevista con el Ministro de Trabajo. En un tono ya más distante que en anteriores ocasiones, en donde la referencia a su condición de antiguo asesor y director del Gabinete Técnico, desaparecerían, se mantendría todavía cierta proximidad. En lo que nos interesa, y después de calificar la actitud de UGT con respecto al propio Ejecutivo como de “perfectamente correcta”, y otros halagos del tipo “el sindicalismo español, en concreto de la UGT es de lo más avanzado”; se le preguntaría tanto por las declaraciones del Presidente del Gobierno como por su primera intervención en la Comisión de Política de Empleo y Social al respecto de la contratación temporal. En un tono políticamente correcto y muy medido afirmarí­a como “veo que UGT comprende el tema de la contratación temporal, lo crítica en determinados aspectos, lo cual me parece hasta cierto punto lógico cuando uno lo mira desde el ángulo sindical, y, sin embargo, en Europa hay sindicato y sindicalismo que se oponen tajantemente a este tipo de contratos”. E interrogado sobre el tipo de control que se podría llegar a establecer en concreto, optaría por *salir por la tangente* y referirse, en exclusiva, por los fijos discontinuos²⁹.

Ahora bien, por más que se quisieran evitar los *roces* innecesarios, lo cierto, es que ya por ese tiempo –meses de marzo y de abril– desde Trabajo se venía pergeñando algunos planes reformistas en esta línea. De esta forma, y prácticamente sin previo aviso y dejando atrás todos los postulados electorales, se conocería como venía trabajando en un Orden ministerial que iba a modificar radicalmente el RD 3887/1982. Inclusive, por más que la UGT estuviera enfrascada en su XXXIII Congreso, saldría al paso rechazando tales pretensiones. Aunque no pararía la iniciativa de Trabajo, conseguiría, a la postre, tras un duro comunicado de la FEMCA, subsanar las medidas discriminatorias relacionadas con el Sector de la Construcción³⁰.

como hemos hecho en anteriores ocasiones». En la carta de Redondo, unos días después, rechazaría tajantemente tal posibilidad con los siguientes argumentos: «A la hora de plantearnos la conmemoración de este 1º de Mayo no podemos hacer abstracción del profundo deterioro de las relaciones entre ambas Organizaciones que ha conducido a la constante manipulación interesada que vuestra Organización viene realizando sobre la política de la UGT, los graves enfrentamientos creados por la falta de aceptación de los resultados de las elecciones sindicales por parte de CCOO con el incalculable perjuicio sobre la credibilidad de los sindicatos entre los propios trabajadores, los profundos distanciamientos creados entre nuestras dos Organizaciones ante cuestiones concretas como consecuencia de la política de agitación y exacerbación de los intereses corporativos puesta en marcha por amplios sectores de vuestra Organización». Por tanto, se remarcaba, como era «invi­able en esta ocasión la adaptación de una posición común a nivel global o confederal de cara al 1º de Mayo». “La dirección de UGT rompe la unidad del 1º de Mayo”, *Gaceta Sindical*, nº 25, (1983), p. 4 [una lectura radicalmente diferente de las citadas misivas se puede encontrar en: “Un primero de mayo diferente”, *El Socialista*, nº 305, (1983), pp. 30-31]. Por lo demás, en aquel mismo número se incluía el manifiesto de CCOO para el 1º de Mayo: “Por el empleo, el desarme y la paz. Declaración de la CS de CCOO ante el 1º de Mayo”, en donde se reivindicaría del Plan de Solidaridad de CCOO, y se recordaría como por primera vez desde el fin de la dictadura «la dirección de UGT ha rechazado la invitación de CCOO para celebrar conjuntamente» tal fecha. Un manifiesto en el que se evitarían reproches pero sobre todo las críticas abiertas al Gobierno y su política económica, a los escasos cinco meses de su llegada a La Moncloa. Por parte de UGT en su manifiesto no se señalaría nada sobre la división sindical, limitándose a defender su «Programa de reformas frente al paro y la crisis». Editorial, “Manifiesto 1º de Mayo”, *Unión*, nº 40, (1993), p. 2. Prácticamente los mismos argumentos, se podían encontrar en, Editorial, “Primero de mayo: solidaridad”, *El Socialista*, nº 307, (1983), p. 7. Precisamente, no pocas de las diferencias y distancias entre las dos principales centrales sindicales del país, residía en el significado dado a tal efeméride: mientras que CCOO siempre lo consideró como un acto reivindicativo y de exaltación de la lucha obrera, en cambio UGT tanto en 1983 pero de forma más clara al año siguiente, trataría de despojarlo de tal significado para resaltar el carácter festivo. Un doble enfoque, que llevaría a un nuevo proceso de enfrentamiento, con no pocas consecuencias entre UGT y CCOO, tal y como se explica en el apartado “12.1. De vuelta a los *despachos*: el largo preámbulo de la reconstrucción del *fallido diálogo social* (febrero-julio1984)”.

²⁹ Entrevista, “Joaquín Almunia”, *Unión*, nº 40, (1983), pp. 4-5.

³⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los parados con subsidio podrán ser llamados a trabajar”, *El País*, 15 de mayo de 1983; Noticia, “Los sindicatos UGT y CCOO habían criticado duramente la orden

Más contundente se mostraría Comisiones Obreras una vez informada en el Consejo General del INEM. El 19 de abril de 1983 el Consejo Confederal aprobaría una dura resolución al respecto de las pretensiones de ampliar la contratación temporal, y ello en un tiempo de movilizaciones e inclusive huelgas de hambre contra la contratación temporal en el sector de la construcción. Se decía allí en aquella ocasión como dicha “Orden, facilita más la contratación temporal ya que permite sustituir a un trabajador contratado temporalmente por otro para un puesto de trabajo distinto, mecanismo que fácilmente puede ser utilizado por las empresas para aumentar la contratación temporal, simplemente llevando a cabo una movilidad interna de la plantilla”. Para en un segundo punto indicar como “[c]onsideramos que esta Orden en el fondo modifica el RD 3887/1982 algo jurídicamente incorrecto y lo empeora, aumentando la eventualidad en los sectores de la Construcción y Hostelería”. No terminaría ahí los anuncios, pues, se convocarían toda una serie de movilizaciones, concluyendo como “CCOO defiende que la contratación temporal solamente sea permitida en tareas claramente definidas de naturaleza transitoria o en casos coyunturales de momentos punta de producción”³¹.

De nada valdría las llamadas a la *conciencia programática* y menos las *denuncias* de los comunistas. El 14 de mayo, a menos de un día de la llamada a la concertación por parte de Felipe González, se publicaba en el BOE la Orden 9 de mayo de 1983, *de desarrollo del Real Decreto 1445/1982, modificado por Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo*³². Concluía así el efímero periodo político-jurídico en que los socialistas habían tratado de amortiguar y/o frenar la ofensiva flexibilizadora de los anteriores ejecutivos. Una Orden en la que tras justiciar la misma con “el fin de facilitar la aplicación de las medidas de fomento de empleo previstas en el citado Real Decreto”, en su artículo 1 relacionado con la contratación temporal, se eliminaban los por sí ya escasos obstáculos de cara a evitar su uso fraudulento:

«La prohibición de celebrar contratos temporales para cubrir los puestos de trabajo que hayan quedado vacantes durante el año inmediatamente anterior a la fecha de contratación, por algunas de las causas a que se refieren el artículo 6, apartado 2, del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, según la redacción dada por el Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, se entiende referida exclusivamente al mismo puesto de trabajo».

Otro tanto sucedería con el contrato en prácticas –artículo 2– o las propias medidas que afectaban a determinados grupos de trabajadores desempleados –artículo 3– en donde se venía endurecer la por sí dura legislación al respecto de la inscripción de las demandas en el INEM y de las correspondientes las prestaciones; incrementándose, por otro lado, todavía más las facilidades para acceder a las ayudas y desgravaciones fiscales por parte de las empresas –léase en concreto el artículo 4–. En resumen, con aquella Orden se volvía a la *filosofía original* del RD 1445/1982³³.

promulgada ayer sobre contratos temporales”, *El País*, 15 de mayo de 1983; y asimismo, “La actual normativa puede ser modificada en breve”, *Unión*, nº 42, (1983), p. 3.

³¹ AHT, CCOO-CC, “Resolución del Consejo Confederal ante el proyecto de Orden Ministerial por el que se desarrolla el RD 1445/1982 de 25 de junio modificado por el RD 3877/1982, de 29 de diciembre, por el que regulan diversas medidas de fomento del empleo”, Madrid, 19 de abril de 1983, sig. 2-03.

³² Orden 9 de mayo de 1983, *de desarrollo del Real Decreto 1445/1982, modificado por Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo*.

³³ Los principales efectos de la citada Orden serían explicados concisamente por dos de los abogados del Gabinete Técnico Confederal de CCOO de la siguiente forma: «Esta flexibilización a través de la contratación temporal generalizada se ha acrecentado con la orden ministerial de 9 de mayo de este año, donde la facultad de organización del servicio que ostenta el empresario provoca que resulte difícilmente demostrable si el nuevo contrato sustituye o no en un puesto de trabajo a un obrero anterior que fue despedido de modo improcedente o extinguido su contrato por expediente de crisis o por expiación del plazo temporal pactado». MATEOS CORTÉS, José y LILLO, Enrique, “El desempleo y la contratación temporal”, *El País*, 9 de julio de 1984.

En este mismo sentido, más decisiones y anuncios no faltarían en los siguientes meses. A poco de publicarse la citada Orden de Trabajo, a la par que se conocía nuevos datos sobre la destrucción de empleo, se reconfirmaba como inclusive la contratación temporal había disminuido considerablemente. El 16 de mayo, el entonces director general del INEM, Pedro Montero, a tenor de los datos expuestos, ya afirmaba como desde el Ministerio de Trabajo se estaba estudiando nuevas medidas de cara al mercado laboral, aunque sin mayores detalles. Sin duda un posible indicio de que las directrices de la puesta en marcha del amplio paquete reformista habían llegado al citado Ministerio. Con todo, tampoco tendría en reparo el propio Montero en salir al paso de las acusaciones de CCOO y de UGT de haber ampliado el contenido flexibilizador del RD 3887/1982, a través de la citada Orden del 9 de mayo negando la mayor³⁴.

Así pues, y cuando todavía se estaban negociando los restrictivos PGE para 1983³⁵, desde La Moncloa, tras dar a conocer su ambicioso proyecto de reformas, empezaría a marcar una futura agenda política con sus temas de discusión y con sus tiempos de debate. Daba inicio, de esta forma, la apertura de una etapa política que en lo que nos concierne en relación a la configuración de la RET'84, llegaría hasta finales del año siguiente. En medio de un acelerado proceso de destrucción de empleo y otras tantas señales alarmantes de profundización de la crisis, tal *anuncio* venía, a su vez, acompañado de una clara apuesta por la contratación temporal y una privatización limitada de la Seguridad Social. Sumado a la política de reducción salarial y de lucha contra la inflación³⁶, la reforma del mercado de trabajo, por tanto, empezaba aparecer como un *pilar fundamental* de la naciente estrategia de la modernización socialista. Cuando todavía quedaban varios meses para que la primera versión del PEMP se hiciera público –en concreto en septiembre de 1983– se avanzaba como el mismo se sustentaría en materia de política de empleo en “nueva regulación de los contratos temporales y a tiempo parcial, se van a reordenar todas las medidas vigentes de fomento del empleo y se van a potenciar mediante incentivos (vivienda, educación, etcétera) la movilidad laboral”. La fecha fijada para que se concretarán tales propósitos legislativos aparecería marcada: el 1 de enero de 1984³⁷.

De cara a estos primeros pasos en torno a la conformación del núcleo duro del futuro PEMP, desde la Dirección General del Plan del Ministerio de Economía y Hacienda –a cargo de Alfonso García Santa Cruz– se venían enviando una serie de misivas a los diferentes agentes e interlocutores sociales y económicos solicitándoles sus diferentes criterios al respecto así como un posible temario. Es en esta misma tesitura, donde se ha de encuadrar el anuncio programático de la CEOE al respecto. Todo ello, exactamente a los os días después del anuncio gubernamental. Así la gran patronal española daría a conocer un estudio propio en donde se hacía todavía más patente el agravamiento de la crisis económica. No sólo habían descendido la contratación temporal en lo que se llevaba de año, sino también la figura más empleada hasta

³⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los contratos temporales han sufrido una fuerte caída en los últimos meses”, *El País*, 17 de mayo de 1983. Un día después Miguel Boyer, Ministro de Economía, presentaba los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para aquel mismo año. Tras reiterar su convencimiento de que la «lucha contra la inflación debe verse facilitada por una actitud de moderación salarial» incidía en la necesidad de reformas estructurales en donde la Seguridad Social y el mercado de trabajo ocupaban un lugar privilegiado. Noticia, Carlos Gómez, “Boyer presentó los presupuestos del Estado, con un llamamiento a la necesidad de moderación de los incrementos salariales”, *El País*, 18 de mayo de 1983.

³⁵ Véase Capítulo 7, *nota 14*.

³⁶ Noticia, “Reducción salarial e inflación al 8% , proyectos del Gobierno para 1984”, *El País*, 19 de mayo de 1983.

³⁷ Noticia, Juan Carlos Gumucio, “Flexibilidad laboral y privatización limitada de la Seguridad Social”, *El País*, 15 de mayo de 1983.

entonces: los contratos bonificados. Su apuesta era del todo previsible: una mayor flexibilización y liberalización del mercado de trabajo³⁸.

Más allá de la posición que adoptaría, en breve, UGT, desde el Secretariado Confederal de CCOO se enviaría una larga contestación a Economía, en donde se expondría, uno por uno, sus puntos de partida, y que, a la postre, marcarían, en buena media, la agenda del futuro proceso de concertación social. Una misiva también con fecha del 17 de mayo. Tras requerir que se estableciera un “marco” y un “método” de trabajo, solicitaba, en primer término, una primera reunión a alto nivel entre sindicatos y patronal y los responsables de Economía y Trabajo, incluido el Presidente, con “el fin de elaborar un plan económico de solidaridad contra el paro y la crisis, con un horizonte de cuatro años”. De nuevo, en aquella carta se volvía a insistir en la necesidad de discutir el PSNPC tantas veces propuesto por CCOO. En cuanto a los plazos se indicaba, asimismo, como las negociaciones debería estar terminadas en “septiembre u octubre del año en curso y en todo caso finalizar antes de que se comienza la próxima negociación colectiva”.

Siete serían los puntos propuestos como posible temario: 1. Protección a los parados; 2. Reparto del trabajo; 3. Lucha contra el trabajo precario y negro; 4. Generación neta de puestos de trabajo; 5. Salario indirecto; 6. Salario directo. Mantenimiento del poder adquisitivo; y 7. Financiación del Plan de Reforma Fiscal. A lo que se sumaba dos puntos dedicados al *desarrollo constitucional* y a *reforma legislativa*, en donde se incluía una revisión del Estatuto de los Trabajadores. E igualmente en un *informe* adjunto, entre otras cuestiones, trazaba los puntos de partida para Comisiones Obreras en relación a la política de fomento del empleo:

«Hasta ahora, las iniciativas en el ámbito del fondo al empleo, se han basado únicamente en bonificaciones y temporalidad en la contratación. Estas medidas más que una política específica de empleo sobre determinados colectivos, han sido en la práctica inconexas e ineficaces en algunos casos, dando lugar en los últimos años a una generalización de la contratación temporal, posibilitando un proceso de sustitución de trabajadores fijos por eventuales. Este efecto de sustitución es más acusado en determinados tipos de empresas, donde existe un ‘umbral de sustitución’ a partir del cual es rentable despedir a un trabajador y contratar a otro temporalmente».

Expuesto el marco de análisis sobre los efectos negativos de la política de empleo implantada, y solicitado un estudio más amplio sobre la misma, se propondría como primera propuesta la siguiente: “una primera línea de actuación debería abordar medidas tendentes a evitar la generalización de la contratación temporal y a aumentar la protección de los trabajadores contratados eventualmente”. Acompañándose de la necesidad de “hacer un efectivo control, tanto sindical como institucional”, en torno a esas medidas, junto con la necesidad de “llevar a cabo un programa integral de medidas de fomento al empleo, con criterios más técnicos y selectivos que los actuales”. Para concluir afirmando como “es obligado la lucha contra el trabajo precario en la que es necesaria junto con la represión del delito social, una política que permita la transformación del trabajo precario en estable y consolidado”³⁹.

³⁸ Por lo demás, desde hacía meses en medios cercanos a la patronal, y principalmente por boca del Presidente de la CEOE, se había venido avisando o advirtiendo –según se quiera leer– como «es imprescindible establecer el clima de confianza en el mundo inversor y empresarial». Noticia, “Ferrer: No hay clima de confianza para invertir”, *ABC*, 17 de marzo de 1983.

³⁹ AHT, CCOO-SC, Marcelino Camacho, “Carta al Sr. Alfonso García Santa Cruz. Director General del Plan Ministerio de Economía y Hacienda”, Madrid, 17 de mayo de 1983. Una misiva en donde se adjunta “Propuestas para el Fomento del Empleo”, sig. 004-011.

10.2.1.1. El XXXIII Congreso de la UGT: el «bautismo» en la lógica de la modernización socialista (junio 1983)

A pocos días del inaugurarse el trascendental XXXIII Congreso Confederal de UGT, a principios del mes de junio, desde el Gobierno al mismo tiempo que se llamaba a la concertación social, no se dejaba de proyectar la necesidad de realizar los consabidos e importantes *sacrificios*, en donde la cuestión salarial constituía su principal punto de apoyo. Poco a poco, y las más de las veces de forma imperceptible, cada vez iba quedando más claro la dirección del conocido “ajuste positivo”. Junto a las promesas de no ampliar el sector público, de moderar todavía más los salarios, la llamada al siempre deseado capital extranjero se fundamentaba en una reducción de los costes empresariales, y en donde la flexibilidad jugaba un papel determinante⁴⁰.

En paralelo, y por más que desde la CEC de UGT se hicieran ímprobos esfuerzos en presentar a la organización unida –o cuando menos sin fisuras aparentes– digna vencedora de las últimas elecciones sindicales, y más consolidada y reforzada a nivel organizativo; no se podía ocultar como en menos de siete meses, y pese a la hegemonía electoral política y en menos medida sindical del socialismo español, el desgaste de ser co-partícipe de la estrategia gubernamental modernizadora empezaba a pasar factura en diferentes frentes. A lo que venían a añadirse otros problemas de carácter interno menos conocidos públicamente, pero que también estaban comenzando a hacer mella. Y entre ellos, además, de ciertos enfrentamientos entre dos dirigentes centrales, estaba el carácter “presidencialista” que se había auto-otorgado la Comisión Ejecutiva Confederal frente al Comité Confederal, y que inclusive a nivel interno se había detectado y denunciado a modo de autocrítica⁴¹. En cualquier caso, y al igual que sucedería durante todos estos años en el PSOE, el control de la organización frente a posibles disidencias y críticas estaba asegurado tanto por el modelo congresual a la hora de la elección de los delegados, como por el fuerte control de la Secretaría de Organización a manos de Antón Saracíbar. Eso sí, como en todo proceso congresual, y más tras los anteriores y complicados años de gestión, las sorpresas podían saltar.

Siempre presto desde *El País* a recoger, en primer lugar, la versión oficialista de la UGT anunciaría ya un 23 de mayo como el “33º Congreso se perfila como de continuidad y sin sorpresas” e inclusive *sin nervio*. Más aún, pues se afirmaría como no se esperaban grandes cambios en la dirección ni en la política sindical. Ahora bien, ya se dejaba caer como se modificarían y se dotarían de nuevos contenidos algunas secretarías para evitar los enfrentamientos y tensiones entre la Secretaría de Relaciones Sindicales y la Secretaría de Acción Reivindicativa, a cargo de Zufiaur y Corcuera, de cara a diferenciar sus funciones de forma más clara. Tensiones que serían “discretamente ocultad[a]s por la estructura del Congreso”. También se avisaba de que Manuel Chaves el “consejero áulico” de la Secretaría General, conservaría su poder, pese a estar cada vez más implicado en las tareas del partido. Parecía, pues, que tan sólo las federaciones de Banca y Construcción, a las que desde la CEC se les animaba a dar cierta batalla, jugarían el papel de críticos, de cara a evitar la imagen de un sindicato cerrado, sin crítica y demasiado oficialista. Una invitación que rápidamente sería recogida. Por cierto, de lo que no hablarían las crónicas, ni antes ni después, sería del malestar tanto de las citadas federaciones como de otras uniones territoriales frente al papel jugado por la UGT desde la llegada al Gobierno de sus compañeros fraternales del Partido. Presentándose,

⁴⁰ Noticia, Gustavo Matías, “Felipe González y Alfonso Guerra abren esta semana la ofensiva económica del Gobierno”, *El País*, 30 de mayo de 1983.

⁴¹ En la última reunión de la CEC antes del Congreso, a no más de cinco días del último CC ordinario, se haría una valoración negativa del mismo dada su «repercusión escasa que ha tenido en los medios de comunicación» como por «algunas faltas de asistencia no explicadas». Lo que llevaría a la propia dirección a tratar de relanzar el *carácter político* del CC, mediante un mayor enriquecimiento de sus contenidos y funciones. AHFFLC, UGT-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. 20.4.83”, sig. 002561-002.

a lo sumo, los posibles puntos de divergencia en bases a cuestiones internas relacionadas con la organización⁴².

Dentro de este contexto de calma y a menos de una semana e inaugurarse el Congreso, el domingo 26 de mayo, Nicolás Redondo presentaba el mismo en rueda de prensa, a través de un largo guión que sería ampliamente recogido, casi de forma total, por *El País*⁴³. Tras destacar como participarían más de 800 delegados o resaltar los altos mandatarios e importantes políticos que asistirían, se volvería a insistir en las mismas cuestiones, asegurando el propio Secretario General de UGT *saliente* como “[y]o prefiero un Congreso tranquilo y sereno, aunque eso no sea noticia y los periodistas prefieran el escándalo”. Asimismo dejaría asentado, adelantándose a posibles críticas, como “la concertación social no debe ser un sistema de política sindical, sino que debe responder a una determinada estrategia coyuntural”. Tocaba pues presentar a la UGT como un sindicato autónomo del Ejecutivo, libre de críticas, y lejos de favores gubernamentales. Incluso mostraría su preocupación por la falta de información del plan cuatrienal del Gobierno, pero ante todo las propuestas de “flexibilización del mercado de trabajo, contratación temporal y fondos de pensiones”, cuando ni siquiera se habían puesto sobre el tapete las mismas⁴⁴. No erraría Redondo quien sabría leer perfectamente lo que se aproximaba, lo que conduciría, a su vez, a la UGT a muy duras pruebas de capacidad política y tenacidad organizativa⁴⁵.

Pero la relativa tranquilidad y la supuesta atonía que envolvían los días previos pronto se vendrían abajo. Y en ello en varios frentes. Por parte de destacados miembros del Ejecutivo, principalmente del *ala económica* dura, se pondría entonces la estrategia de realizar fuertes declaraciones político-económicas antes de cualquier congreso, fuera de UGT o del propio PSOE, como criticaría tiempo después Alfonso Guerra⁴⁶. En este sentido, nada aventuraría en positivo el anuncio de que González –teniendo en cuenta no pocos precedentes– participaría a un día de inaugurarse el XXXIII Congreso ugetista en una conferencia ante empresarios extranjeros en el foro del Herald Tribune. Y así fue en parte. Mientras que en aquella ocasión el Presidente estaría más comedido, Solchaga este no dudaría en afirmar lo que ya era evidente en un ejercicio de realismo económico: no se cumpliría la promesa de los 800.000 empleos. Y, por

⁴² Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT mantendrá su actual equipo dirigente para garantizar la continuidad de su política sindical”, *El País*, 23 de mayo de 1983.

⁴³ AHFFLC, UGT-CEC, “Rueda de prensa”, XXXIII Congreso celebrado en Madrid los días 1 a 5 de junio de 1983, sig. 002276-006.

⁴⁴ Noticia, “800 delegados asistirán al 33º Congreso de la UGT”, *El País*, 27 de mayo de 1983.

⁴⁵ Asimismo resulta de interés leer la entrevista que concedería el propio Redondo a *Unión* en el mes de mayo antes del Congreso. Entre otras cuestiones, afirmaría: «El Gobierno debe mantener un discurso político dirigido a la izquierda y a las capas populares; no olvidemos que hay impaciencias que algunas pueden ser ilegítimas, pero otras son totalmente legítimas y de éstas debe hacerse cargo el Gobierno y la Unión General de Trabajadores». Entrevista, “Nicolás Redondo”, *Unión*, nº 43, (1983), p. 81. En muy parecidos términos se manifestaría el propio Secretario General de UGT en una entrevista concedida a *El Socialista* en el mes de junio, advirtiendo de los riesgos y de los posibles conflictos, por consiguiente, que podrían llegar a producir la posible puesta en marcha de los *planes flexibilizadores* del Ejecutivo: «Nuestra organización continuará llevando la política de responsabilidad que siempre ha tenido, pero vamos a estar vigilantes para que el Gobierno que ha sido elegido por diez millones de votos de ciudadanos y ciudadanas haga una política sin olvidar a las capas populares. Suponemos que habrá diferencias inevitables entre el Gobierno y la UGT, que ya se están adelantado, como, por ejemplo, en los anuncios que se han hecho desde ciertos departamentos de dar vía libre a una flexibilización del mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? En todo caso, nosotros no estamos de acuerdo, como tampoco lo estamos en la modificación de los contratos temporales o en la posible constitución de un fondo de pensiones para la jubilación. Sobre el plan cuatrienal no sabemos nada por el momento [...]. En fin, son temas todos ellos que tendremos que vigilar, porque estamos empeñados en el triunfo de este Gobierno, aunque también sabemos que el éxito de este Gobierno tampoco quiere significar el éxito de UGT». Entrevista, “Nicolás Redondo”, *El Socialista*, nº 312, (1983), p. 29.

⁴⁶ Véase lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 431*.

más que Almunia saliera al paso casi de inmediato, y dijera que aunque difícil no era descartable y como sería necesaria la colaboración de todos para poder alcanzar tal objetivos, aquellas declaraciones se producirían a menos de veinticuatro horas de abrir el Congreso de la central ugetista, que entonces y tiempo más adelante no cesaría en advertir que se podría cumplir dicho *compromiso electoral*⁴⁷. De hecho, tal sería el escándalo montado que pocos días después en la única intervención que se recuerde al respecto, el mismo Boyer saldría en defensa de la posibilidad de cumplir, llegó el momento económico preciso, la citada promesa electoral⁴⁸.

Al “regalo envenenado” por parte del Gobierno, desde las federaciones ugetistas de Banca y Construcción, junto con las uniones provinciales de Madrid y Valencia –y otras que se sumarían en los días siguientes y que no tendrían tanta *visibilidad mediática*– se tomarían muy en serio la invitación de parte de la CEC de *animar* el pre-Congreso. Justo Fernández, uno de los hombres fuertes y más respetados de la UGT, declararía como “tras el Congreso acaba la mitología de Nicolás Redondo, y hay que empezar a pensar en su sustitución”. Sin conocer todavía si abandonarían o no el Congreso antes de la votación para la nueva dirección, anunciaban como se abstendrían en la votación de la *gestión de la Ejecutiva*, lo que, en términos internos, se podía leer como un voto en negativo así como de claro rechazo. De esta forma, desde Banca se cuestionaría los cada vez más poderes omnímodos de la CEC así como su forma de proceder en la política de concertación social⁴⁹. También se conocería a un solo día de inaugurarse como la Comisión de Ejecutiva de Navarra había dimitido, y aunque se negaban posibles discrepancias, todo parecía indicar que el asunto, en parte, obedecía a incluir la palabra “trabajadores” en un comunicado criticando el asesinato de dos guardias civiles por parte de ETA⁵⁰. No finalizarían ahí los movimientos. El mismo martes 31 de mayo la poderosa Federación de la Madera, Construcción y Afines (FEMCA) hacía público un comunicado en donde se informaba como se había enviado a Trabajo una carta criticando la política relacionada con la contratación temporal impulsada desde el Ministerio tras el ya indicado decreto⁵¹, y se decía literalmente como “el Gobierno parece estar siguiendo la política de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en la contratación temporal en construcción”⁵².

⁴⁷ Noticia, Gustavo Matías, “Felipe González y Alfonso Guerra abren esta semana la ofensiva económica del Gobierno”, *El País*, 30 de mayo de 1983; Noticia, Pilar Bonet, “El ministro de Industria considera «casi imposible» la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo”, *El País*, 1 de junio de 1983; Noticia, “Crear empleo es difícil, pero posible, según Almunia”, *El País*, 1 de junio de 1983. Véase aquí lo apuntado en el Capítulo 4, *nota 471* y en el Capítulo 9, *nota 436*.

⁴⁸ Noticia José Antonio Frías, “Boyer reafirma el compromiso de 800.000 empleos”, *El País*, 5 de junio de 1983. Asimismo desde las filas socialistas no se dudaría, en aquella ocasión, en salir en tromba en la defensa de la propuesta del programa electoral. Así, por ejemplo, *El Socialista* acusaría a la «prensa sensacionalista y de derechas» la manipulación de las palabras de Solchaga. “800.000 nuevos puestos de trabajo al final de legislatura”, *El Socialista*, nº 313, (1983), pp. 18-19. Tres números después el propio Solchaga, entrevistado por el propio *El Socialista*, en la práctica se reafirmaría en sus declaraciones, a la par que defendería el proyecto de reconversión industrial mediante la necesaria recesión de despidos: Entrevista, “Carlos Solchaga”, *El Socialista*, nº 316, (1983), pp. 25-30.

⁴⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Banca y las uniones de Madrid y Valencia se abstendrán en la gestión de la ejecutiva de UGT”, *El País*, 31 de mayo de 1983.

⁵⁰ Noticia, Carmelo C. Ridruejo, “Dimite en pleno la comisión ejecutiva de la UGT de Navarra”, *El País*, 1 de junio de 1983.

⁵¹ Real Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, *por el que se modifica el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo*

⁵² Noticia, “La central socialista de la construcción rechaza la contratación temporal”, *El País*, 1 de junio de 1983. En medios de importantes movilizaciones de CCOO en dicho sector, a lo largo de los meses de verano del año ochenta y tres, ante la falta de un convenio pero sobre todo por los planes gubernamentales anunciados, Joaquín Almunia escribiría a Manuel Garnacho, Secretario General de la Federación de Construcción, Maneras y Afines de la UGT, un 11 de julio. En un tono cercano –«Querido

Bajo el lema, “Desde el poder sindical a la solidaridad”, UGT afrontaba en la mejor de las condiciones posibles su XXXIII Congreso Confederal, que se celebraría en Madrid entre el 1 al 5 de junio de 1983. En aquella ocasión, y en un gesto a tener muy en cuenta, el *informe de gestión* se filtraría, de forma previa, a *El País*⁵³. También se daría a conocer como las respectivas Comisiones de Trabajo estarían cerradas a la prensa, y lo que quizás era tanto o más significativo: no se invitaría a Comisiones Obreras al mismo.

Por la mañana del miércoles 1 de junio, tras algunos pitidos cuando sonaría el nombre de Joaquín Almunia como invitado, entre otros detalles, vendría una intervención obrerista con el puño levantado de Alfonso Guerra. Afirmaría el Vicesecretario General del PSOE y Vicepresidente del Gobierno que se crearían los 800.000 puestos de trabajo. Hasta el último, en concreto. Para a continuación volver a remarcar los principales retos económicos del Ejecutivo –inflación y reducción del déficit público– y haciendo referencia tanto a la reconversión industrial como al tema de la OTAN, de la que estaba más que seguro que los ciudadanos españoles estaban deseosos de pertenecer. En un repaso por las medidas de corte social y sindical, curiosamente omitiría cualquier mención a la flexibilización del mercado de trabajo⁵⁴.

Cuando los ánimos políticos de los delegados asistentes todavía no habían amainado, a la vuelta de la comida, Redondo comenzaría a partir de las 17.00h a leer el largo *informe de gestión* de sesenta y seis folios en nombre de la CEC. Más de lo que allí se pudiera escuchar a nivel de hecho, el mismo era esperado con atención en torno a lo que señalaría sobre qué tipo de relaciones pudieran darse en adelante con el Gobierno. “La realidad no admite triunfalismos”, advertiría, en un primer instante, el Secretario General saliente. Repasado los vibrantes años anteriores, en donde el éxito del socialismo español en su conjunto constituía un hecho histórico, se entraría en materia para explicar las bases del apoyo al Ejecutivo: “un apoyo fraterno y crítico”. Recordados los fuertes lazos históricos que unían a la familia socialista, se ponían como metas futuras “la política de solidaridad y consolidar nuestra organización”.

Las condiciones *objetivas* y *subjetivas* no podían ser mejores para el conjunto del proyecto socialista, que había tenido que superar muy duras pruebas, sobre todo en el lado sindical. Condiciones que todavía se evidenciaban mejor en tanto “CCOO [estaba] inmensa en agudas contradicciones que ha demorado y demora, su necesaria puesta al día en beneficio de los intereses de los trabajadores y de la propia unidad sindical”. Dicho esto, se internaría por el espinoso asunto teórico de definir, o en su caso *redefinir* el casamiento de la teoría con la praxis en torno al inmediato futuro:

Manolo» comenzaba la misiva– y retomando una conversación personal, le aseguraría como seguían con preocupación dicha problemática. Una carta, en cualquier caso, que tenía un claro objetivo: tratar de calmar a dicha federación para distanciarla de la movilizaciones de Comisiones Obreras, y atraerla a una mesa de negociación, tal y como se venía propugnando desde los ámbitos socialistas [“Nuevas huelgas sobre el fondo de división sindical”, *El Socialista*, nº 311, (1983), p. 27, en donde el propio Garnacho calificaría como de «irresponsable y oportunista» a CCOO por su actitud movilizadora]. Así y tras referirse el propio Almunia a la falta de falta de acuerdo se decía como «a pesar de las dificultades de los últimos meses, hemos contemplado vuestras preocupaciones en el marco más global del Programa a medio plazo que en estos momento estamos elaborando en el seno del Gobierno, y que hemos empezado a exponer a las Centrales mayoritarias sindicales y a patronales». Para concluir: «En la medida en que, como resultado de estos contactos pudiese surgir la posibilidad de llegar a acuerdos globales o explícitos entre el Gobierno y al UGT sobre las reformas necesarias del mercado de trabajo y de las prestaciones sociales, espero que vuestras preocupaciones queden recogidas por la versión definitiva de nuestro Programa a medio plazo. Recibe un cordial saldo de tu buen amigo». AHFFLC, “Carta de Joaquín Almunia –Ministro de Trabajo y Seguridad Social– a Manuel Garnacho –Secretario General de la Federación de la Construcción, Madera y Afines de la Unión General de Trabajadores”, Madrid, 11 de julio de 1983, sig. 002902-009. Localizada en el Fondo de la Secretaría de Acción Sindical.

⁵³ Noticia, Rodolfo Serrano, “La política de concertación centrará los debates sobre la gestión de la ejecutiva confederal”, *El País*, 1 de junio de 1983.

⁵⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “Alfonso Guerra asegura que el Gobierno cumplirá el compromiso electoral de crear 800.000 puestos de trabajo”, *El País*, 2 de junio de 1983.

«A pesar de su ratificación por nuestros órganos máximos, y por la mayoría de los trabajadores, de la línea estratégica de la Unión General de Trabajadores, que algunos llaman ‘política de concertación’ y yo prefiero llamar ‘política de solidaridad’, porque es esta la denominación que corresponde a la teoría y la práctica que defendemos, se ha dicho que es mala en sí misma. Afirmación que me parece excesiva. La negociación, siempre, y los acuerdos, eventualmente, constituyen realidad insoslayable en la práctica sindical dentro de un sistema económico como el nuestro».

En las anteriores líneas se encuentran una de las claves de aquel Congreso, que tanto daría que hablar. Sin prácticamente crítica alguna se defendería lo realizado, calificando la gestión presentada como todo un éxito casi sin fisuras. Un *éxito* que había sido posible, ante todo, por la “política responsable que hemos llevado a cabo en estos años”. Responsable en tanto se había adaptado a la realidad, y asimismo había evitado en caer en una “sobrecarga ideológica”. Tesis esta última repetida hasta la saciedad por el conjunto del socialismo.

Presentando el marco teórico de acción, los éxitos de la gestión, se afrontaría con evidente entusiasmo el análisis sobre los porqués se habían firmado toda una pléyade de acuerdos sociales o acuerdos interconfederales. Así, por ejemplo, con respecto al AI’83, se hablaría de la riqueza de los acuerdos adoptados –por más que, en la práctica, tan sólo fuera un acuerdo salarial– con la consiguiente crítica a CCCO y a la CEOE. “El AI es en mi opinión un hecho positivo [...] sin que pueda estimarse este resultado por imperativos políticos, o la resignada aceptación de un mal menor”. Un acuerdo al que se le otorgaba una tremenda importancia al haber evitado el “tremendismo” conflictivo. Ni una sola línea se hablaría de lo difícil y complicado que resultó el mismo.

Explicada la decisión de ir *por separado* al último 1º de Mayo en lo que no dejaba de ser una mezcla de argumentos y contraargumentos poco convincentes, y en donde sobresalía la crítica a CCOO, nuevamente, por la “actitud de hostigamiento” contra el Gobierno pero también contra la misma UGT, vendría la correspondiente defensa de la “independencia y la autonomía” de la central socialista frente al Ejecutivo:

«Comenzaría señalando que no han sido fáciles, quizás por inexperiencia sobre el modo de estructurarlas, y que nos obligó a ir construyendo criterios sobre una marcha, donde han existido desajustes y diferencias que lejos de todo dramatismo es preciso valorar como inevitables y positivas, si somos capaces de extraer de ellas sus enseñanzas».

Evitando introducir mayores puntos de discordia, y no por la falta de ellos, se hablaba de “coherencia” en las *no fáciles relaciones* así como de la falta de “capacidad de iniciativa” en algún caso. Pero el diagnóstico como el pronóstico no dejaban lugar a dudas: “La defensa del Gobierno era y es, la defensa de una opción progresista y democrática construida con el apoyo de los trabajadores”.

A nivel interno, se saldría al paso de no pocas críticas cuando expresaría su “reconocimiento al Comité Confederal” por su trabajo. Aunque había habido “errores”, se trataba de una gestión “que califico de razonablemente positiva”.

Ya en una segunda parte se presentarían las líneas de acción futura. Sin invitación previa para tales tareas, la UGT se auto-encargaba la “responsabilidad de impulsar la democratización del aparatado democrático del Estado”. Con la perspectiva fijada en el año 2000, el futuro de la central socialista pasaba, en primer lugar, por involucrarse en ese mismo aparatado burocrático de la Administración en multitud de frentes para “gestionar o cogestionar” el mismo. En un panorama dominado por un Ejecutivo socialista tocaba por tanto *dialogar* y “mantener equilibradas relaciones entre el Gobierno y las organizaciones sociales que la brindan su apoyo y constituyen sus canales de inserción social”. Había llegado la hora de extender la “hegemonía democrática” del conjunto de la familia socialista, lo que pasaba por hacer cumplir el programa socialista.

Un programa sometido a no pocas presiones y miedos de derecha a izquierda. Precisamente, por la *izquierda* –con buen criterio– se observarían las mayores dificultades ante la “tentación del PCE de recuperarse a través de una oposición cerrada”, a lo que se añadía la

“politización de CCOO que continuará una acción sindical, más atenta a las necesidades del PCE que los intereses de los trabajadores”⁵⁵. La amenaza del “campo comunista” parecía del todo peligrosa y digna de tener presente. Frente a la creciente “conflictividad política” no quedaba más remedio que cerrar filas con el Gobierno. Más aún cuando las “relaciones [entre] UGT-CCOO serán especialmente complejas”. Como no podía ser de otra forma, se mantendría el presupuesto teórico de caminar hacia la unidad de acción, sin caer en “afirmaciones voluntaristas”. Para ello parecía “preciso dar el debate con CCOO en el seno de la clase trabajadora”.

Crecer, ampliar, modernizar y tensar a la organización también figuraría entre las principales prioridades, en un marco político en que se conocía como la “propia «política de solidaridad» está generando una contradicción, al imponer esfuerzos y sacrificios a los trabajadores afiliados, cuyos beneficios son los no afiliados, con o sin empleo”. Una política de solidaridad que había que demostrar con los hechos, de cara a la “ruptura de hábitos insolidarios de ciertos sectores de trabajadores”. Recogiendo la invitación del propio Felipe González realizada en la fiesta del 1º de Mayo acerca de participar en los futuros planes de la reconversión industrial se aceptaba la misma.

De cualquiera de las formas, dentro del “marco de relaciones laborales”, y tras plantear como se enfocaría la futura Ley de Libertad Sindical, se dejaría planteando cuáles eran los límites que la UGT no pensaba transigir con respecto a la flexibilización del mercado de trabajo. Las siguientes palabras adquieren una relevancia de primer orden, tras no pocos anuncios y globos sonda durante los meses anteriores por parte del Ejecutivo:

«El Gobierno ha dicho que piensa ‘flexibilizar’ el mercado de trabajo, y en este sentido se han escuchado afirmaciones contradictorias, poco claras una vez y preocupantes otras. Si por flexibilidad se entiende profundizar la parcelación del mercado de trabajo ahondar las diferencias entre trabajadores de plantilla y trabajadores temporales, el rechazo de la fórmula es un imperativo para nosotros. No admitiremos que, so pretexto de liberalizar y hacer más racional el empleo del trabajo disponible, los empresarios obtengan una movilidad de plantillas que termine con el contrato fijo, pues la parcelación del mercado de trabajo, es incompatible con la política de solidaridad que defendemos»⁵⁶.

Más claro no se podía decir y explicar en tan sólo unas frases, y ello se le dedicaría no poco espacio, ante las cada vez más preocupantes como acentuadas críticas que empezaban a darse dentro de UGT sobre este mismo terreno. Primero, por una sencilla razón que tan cierta se demostraría en poco tiempo: si se cedía aquí, tal estrategia supondría el “certificado de defunción de la actividad sindical dentro de las empresas”. Eso sí, no se negaban a “revisar” las modalidades de contratación. No. De lo que se trataba era de ir a una *nuevas* modalidades que pudieran ser “compatibles con una política de creación de empleo, en línea con lo que señala el Programa del Partido, recogiendo, bueno es recordarlo, las reivindicaciones de UGT”. El fin: “garantizar la excepcionalidad de la contratación temporal y un mayor control sindical de las contrataciones especiales favoreciendo su conversión en contratos ordinarios”. Dejando un recado al Ejecutivo sin citar a su mayor responsable: “Y hemos de reconocer que ciertas medidas aprobadas por el Gobierno no van precisamente en esta línea, y de alguna forma están en contradicción con el programa”.

La última parte de aquel discurso estaría destinada a resaltar la *política* y el *compromiso* de la solidaridad de UGT. Como “sindicalistas responsables a la hora de definir nuestras líneas de acción en los próximos años”, no había otra vía posible que mantener la

⁵⁵ En este sentido, resulta aconsejable acercarse al siguiente libro aclaratorio: PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, *Una alternativa a la crisis. Las propuestas del PCE*, Barcelona, Planeta, 1985, con introducción de Nicolás Sartorius.

⁵⁶ Un par de días después Mariano Rubio, entonces subgobernador del Banco de España, declararía como la *rigidez* del mercado de trabajo constituía uno de los principales obstáculos para salir de la crisis, en el enésimo globo sonda que se podía escuchar durante las anteriores semanas. Noticia, “La rigidez del empleo, problema básico, según Mariano Rubio”, *El País*, 4 de junio de 1983.

siempre tan traída *política de solidaridad*. Eso sí, tocaba *definirla y afilar* “sus contenidos y sus límites”. No se trataba solo de aportar “sacrificios”, sino que para la salir de la “crisis” tal reparto tenía estar “justamente distribuido entre el conjunto social”. Acompañándose de un mensaje ético ante el potencial riesgo de *dualización social*:

«Entendemos por solidaridad la respuesta responsable de cada uno de los colectivos que conforman las clases trabajadoras, que aportan su esfuerzo y su contribución con destino a los compañeros peor situados en el mercado de trabajo. Nos hemos negado y debemos continuar negándonos a aceptar como inevitable un proceso de dualización de la sociedad. Porque en una sociedad dual no hay clase trabajadora única, porque en esa sociedad no hay justicia ni paz, y porque ese proceso conduce a la quiebra del Estado y el fin de la democracia».

Si bien se estaría antes y después del Congreso por ser solidarios y estar dispuestos a los sacrificios mediante el “diálogo y negociación”, se exigirían, claro está, “contrapartidas cuantificables y proporcionales al esfuerzo aportado por los trabajadores”. Y, en primer lugar, estas contrapartidas tendrían que proceder de la mano de creación de empleo y de una mejora de la cobertura y de las prestaciones sociales.

Así pues, defendida por enésima vez la autonomía y la independencia de UGT con respecto al Gobierno, se avisaba que de seguir dicha política se podrían alcanzar “posiciones hegemónicas dentro del mundo sindical”. “De nosotros depende”, concluiría Redondo⁵⁷.

Tras el correspondiente cerrado aplauso al discurso del Secretario General, vendría un largo debate de más de siete horas y que terminaría en la madrugada. Aunque finalmente el mismo obtuviera el 75,58% de los votos a favor y tan sólo el 0,36% en contra, el 23,85% de abstenciones, reflejaba un creciente –y desconocido por extensión– malestar en el seno de la organización. A las abstenciones esperadas de Madrid, Banca, Construcción se sumaría en un último momento la de Cataluña, junto con otras uniones menores⁵⁸.

El motivo, los motivos, primero, por el alto poder acumulado por la CEC y el vacío político al que había sido conducido el Comité Confederal en la práctica. No faltarían tampoco las críticas por como se había llevado la política de concertación o la falta de información en este último terreno como en otros tantos. Puntos de crítica que estarían presentes, en adelante, en las siguientes reuniones –tanto ordinarias como extraordinarias– del CC. En este sentido, especialmente dura se mostraría Álava con respecto a la política de pactos⁵⁹. Discrepancias que llegaban cuando ni siquiera se habían empezado a discutir algunas controvertidas ponencias.

El jueves 2 y el viernes 3 estarían dedicados a discutir las ponencias presentadas, en jornadas previstas de más de doce horas, entre las 10.00h a las 22.00h. Mientras que las ponencias de Imagen⁶⁰, Institucional⁶¹ o inclusive la controvertida ponencia de Política Industrial que abordaba el sensible tema de la reconversión, pasarían sin mayores problemas al

⁵⁷ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, Nicolás Redondo, “Discurso apertura del 33º Congreso de UGT”, XXXIII Congreso celebrado en Madrid los días 1 a 5 de junio de 1983”, sig. 002578-001, pp. 1, 3, 5, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29bis, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 44, 51, 52, 59, 59, 60, 61, 65 y 66, respectivamente.

⁵⁸ El informe de gestión se puede localizar en, AHFFLC, UGT, “XXXIII Congreso Confederal. Desde el poder sindical a la solidaridad. Dossier”, sig. 002279-004.

⁵⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Aprobada por amplia mayoría la gestión de la ejecutiva de UGT”, *El País*, 3 de junio de 1983.

⁶⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Ponencia de imagen”, XXXIII Congreso celebrado en Madrid los días 1 a 5 de junio de 1983”, sig. 002578-005. Un documento que establecía las siguientes cinco *imágenes-fuerza* que UGT debía saber transmitir a nivel público y comunicativo: «1. UGT Sindicato mayoritario (iniciativas, proposiciones concretas, resultados elecciones, eficacia, personalidad); 2. Interlocutor válido: ante los diferentes estamentos y organismos sociales; 3. Sindicato fuerte, coherente y honesto; 4. UGT Sindicato democrático y defensor de la democracia; 5. Acciones coyunturales» (p. 4.)

⁶¹ AHFFLC, UGT-CEC, “Política institucional”, XXXIII Congreso celebrado en Madrid los días 1 a 5 de junio de 1983”, sig. 002578-007.

plenario del sábado 4 de junio⁶²; todas las atenciones se centrarían en la ponencia de Acción Sindical, en tanto se pretendía convertirla en el exponente de la *política de solidaridad* ugetista. No sólo, pues allí se contenía una de las propuestas más controvertidas como difíciles de aceptar para buena parte de los delegados, y que, en definitiva, adquiriría una alta relevancia de cara a las futuras negociaciones a lo largo de la primera legislatura socialista.

La citada ponencia de *Acción Sindical* tras internarse por la definición y características propias de UGT, pasaría revista también a la grave situación político-económica de la nación. A partir de ese marco, se internaba por el qué hacer en tiempos de un Gobierno socialista. Si bien tanto en el epígrafe dedicado al mercado de trabajo o las relaciones entre la patronal y el sindicato, apenas contenían novedades apreciables, apostando por mantener el “binomio negociación-presión” o advirtiendo que no se sometería al Gobierno pero tampoco se enfrentaría, previa defensa de la autonomía sindical; se reafirmaría, a continuación la necesidad de construir una “política más global y ofensiva frente a la crisis, basada en la solidaridad de toda la sociedad española”. *Solidaridad* que giraría en torno a tres puntos básicos: el empleo, la protección y el bienestar social. Si, por ejemplo, con respecto a las modalidades de contratación se mantenía una postura abierta, o mejor dicho se optaría por no concretar una postura definida⁶³, y que bascularía, en lo central, en la “limitación de la contratación temporal para apostar por la contratación indefinid[a], y a tiempo completo”, junto con otras medidas clásicas de reparto del empleo; el punto más relevante a la par que conflictivo vendría de la mano de apartado “3.3.4. Política de rentas y poder adquisitivo”.

En términos históricos ugetistas aquel epígrafe era la más clara apuesta congresual por adaptar las tesis sindicales socialistas a las tesis programáticas del Ejecutivo. Así se plantearía, a través de una arriesgada apuesta política, conciliar la postura de UGT y la del Gobierno en materia de *inflación* y de *política de rentas*, aunque tratando –a duras penas– guardar las apariencias. O dicho con otras palabras, la UGT va a proceder a partir de esos mismos párrafos a modificar, de forma sustancial, su política salarial:

«En ese sentido [favorecer la reducción de la inflación y mejorar los niveles de competitividad], la UGT no renunciará al objetivo del mantenimiento del poder adquisitivo, si bien es preciso redefinir su concepción.

Junto al concepto de poder adquisitivo entendido exclusivamente en términos de indicación de los salarios nominales con respecto al índice de inflación previsto, debe coexistir el concepto de Salario Social y con ello, considerar el poder adquisitivo de forma global»⁶⁴.

Es decir, se bien se aceptaba la política de sacrificios salariales no se renunciaba al mantenimiento del poder adquisitivo en un no fácil equilibrio, más cuando este se presentaba, al mismo tiempo, como una propuesta de mejorar el poder adquisitivo global, mediante “una política fiscal progresiva” y otras prestaciones económicas y sociales, como las “mayores prestaciones del subsidio de desempleo”, la “mayor y mejor asistencia sanitaria y de educación”, una “cuantía digna de las pensiones”, junto con otras prestaciones sociales.

⁶² AHFFLC, UGT-CEC, “Política industrial”, XXXIII Congreso celebrado en Madrid los días 1 a 5 de junio de 1983”, sig. 002578-006. Véase en concreto su apartado “Reconversión y reindustrialización” (pp. 3-5).

⁶³ Así se podía leer: «La UGT se pronuncia a favor de cuantas medidas legales se adopten tendentes a la creación de empleo, incluidas las de bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, para aquellos contratos de duración superior a seis meses y que signifiquen creación real de puestos de trabajo. El incumplimiento de estos requisitos debe conllevar la pérdida de acceso futuro a otras bonificaciones». AHFFLC, UGT-CEC, “Ponencia Sindical”, XXXIII Congreso celebrado en Madrid los días 1 a 5 de junio de 1983”, sig. 002578-012, pp. 16-17.

⁶⁴ Por su parte Rubén Vega ofrecería la siguiente lectura: «Estos sacrificios de los trabajadores en activo se verían compensados por medidas que incidan sobre el salario indirecto a través de la potenciación de servicios y prestaciones públicas». VEGA, Rubén, *La reconstrucción del..., op.cit.*, p. 136.

Por tanto habría que considerar, en adelante, el salario en una doble vertiente –el *nominal* y el *social*–:

«Esta dimensión del poder adquisitivo y en definitiva de la política de rentas, exige referenciar la negociación con las organizaciones empresariales en materia de política económica y presupuestaria del Gobierno, siempre que se establezca una política concertada y solidaria frente a la crisis.

Dentro de este objetivo será irrenunciable la cláusula de revisión salarial, a fin de impedir la pérdida de rentas como consecuencia de eventuales desfases entre objetivos macroeconómicos y la evolución real de esos objetivos».

Más allá de otros apuntes y referencias sobre el objetivo de evitar la concentración y capacidad de renta en sectores concretos, aquella propuesta desataría una auténtica *batalla* entre los delegados presentes en la citada Comisión de Trabajo de cara a plenario del fin de semana⁶⁵. Tal sería la situación que las Federaciones del Metal, Alimentación o Uniones como Vizcaya y otras tantas presentarían un escrito para que solicitar una “votación nominal de las medidas dada la importancia y trascendencia de los tema” que se estaban tratando⁶⁶.

Por lo que escasamente se pudo conocer por la prensa –una vez que a los medios se les impediría entrar en las reuniones de trabajo– al final se aprobaría la citada ponencia. No habría, pues, sobresalto y/o sorpresa. Con todo aquel mismo texto había sido interpretado “por algunos sectores como una recomendación de moderación salarial en línea con lo recomendado por el propio Gobierno”. Asimismo, y por lo que también se pudo conocer la ponencia sería ideada y escrita por César Braña, Secretario General de Alimentación⁶⁷. Ya en el plenario se aprobaría la misma con el 98,2%.

Encabezada la citada batalla por la Unión Territorial Álava –cuya dirección sería *expulsada* al muy poco tiempo– la misma presentaría una enmienda a la totalidad –y que sería rechazada por el 74,69% de los votos– al texto original presentado por la CEC, aunque conseguiría arrastrar no pocos apoyos a nivel individual. Pero con todo, y pese a la polémica ponencia sindical descrita, nadie cuestionaría –incluida Álava y Banca– la continuidad de la Comisión Ejecutiva Confederal. CEC que, no obstante, recibiría algunos varapalos al no verse aprobado una modificación de cierta parte de los Estatutos, que entre otras cuestiones pretendía aumentar el mandato de la CEC de tres a cuatro años. Con todo, al final, se terminaría hablando de la aparición de una “oposición crítica dentro del congreso. Oposición que hasta ahora se había limitado a posturas exclusivamente testimoniales”⁶⁸.

⁶⁵ AHFFLC, UGT-CEC, “Ponencia Sindical”, XXXIII Congreso celebrado en Madrid los días 1 a 5 de junio de 1983”, sig. 002578-012, pp. 19-20.

⁶⁶ AHFFLC, UGT-CEC, “Política sindical. Voto particular [manuscrito]”, sig. 002578-012; AHFFLC, UGT-CEC, “Ponencia Sindical”, XXXIII Congreso celebrado en Madrid los días 1 a 5 de junio de 1983”, sig. 002578-012, pp. s/p. Las enmiendas no han podido ser localizadas. De la tensión que se alcanzaría da buena cuenta otro documento manuscrito a mano que se puede localizar en la citada carpeta y en donde se decía lo siguiente: “A la mesa del Congreso: En la votación nominal efectuada sobre la enmienda a la totalidad presentada por Álava en la Ponencia de Política Sindical, la postura de la delegación de la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. es de rechazado a la enmienda y aceptación del dictamen de la ponencia. Por ausencia de la tarjeta de voto SI, aunque no sirva la rectificación, al menos, queremos que quede constancia. Fdo: José Antonio Saavedra”.

⁶⁷ Ilustrativo resulta a acercarse, por tanto, BRAÑA, César, “La política de rentas de UGT”, *El Socialista*, n.º 317, (1983), p. 32. Probablemente el citado dirigente sería uno de los ‘cuadros’ que con más empeño y dedicación trataría de compaginar y equilibrar la política de rentas entre el Ejecutivo y el sindicato socialista. De hecho, en el citado artículo se concluiría de la siguiente forma: «Quiero terminar afirmando que la salida a la crisis y su principal lacra, el paro, no es obra de Felipe González. Es obra de todos. A nuestro presidente le corresponde el buen hacer de aunar voluntades y energías. Ni el mejor entrenador del mundo podrá lograr que un equipo gane si éste no tiene voluntad para ello y junto a jugadores que sólo quieren ‘chupar’ balón, hay otros que corretean indiferentes».

⁶⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “Rechazada en comisión la propuesta oficialista de aumentar el mandato de la ejecutiva de UGT”, *El País*, 4 de junio de 1983.

La imagen de UGT a la salida de su 33º Congreso, en cualquier caso, parecía clara: una adaptación programática a las tesis gubernamentales en materia de salarios, en plena ofensiva liberal de cara a la reducción salarial⁶⁹. Por lo demás, las *nuevas* tesis ugetistas se constituían en un claro un mensaje frente al Ejecutivo y al PSOE⁷⁰, pero también frente a la CEOE y en concreto en relación a las Comisiones Obreras, por más que se quisiera revestir dichas decisiones como de un paso hacia delante y se hablara de aceptación y reacomodación a la nueva realidad vigente⁷¹.

Así pues, el Congreso, así pues, resultaría mucho más movido de lo esperado inicialmente, no sólo por ciertos reverses con respecto a los estatutos sino por la aparición de algún que otro *foco opositor*, que aunque sin peso real constituía una extraña novedad dentro de las fijas ugetistas.

Finalmente, el XXXIII Congreso se cerraría con un altísimo respaldo a la nueva CEC entrante. Una ejecutiva con muy pocas sorpresas en lo relativo a caras nuevas⁷². Tan sólo se producirían tres salidas –José Valentín, Fernando Méndez y Jerónimo Saavedra– y una sola incorporación –José Luis Daza– a la par que se redefiniría los contenidos de las secretarías –incluida su nomenclatura– de dos pesos pesados –Corcuera (Acción Sindical, antes Acción Reivindicativa) y Zufiaur (Acción Institucional, antes Relaciones Sindicales)– a sumar la salida de Chaves de Prensa e Información –entonces ya a cargo de la Secretaria de Acción Sindical del PSOE, aunque manteniendo un asiento sin cartera en la misma Ejecutiva, y por lo tanto, reforzando su papel de enlace Partido/Sindicato– incluido también el reforzamiento de Antón Saracíbar, quien pronto dejaría claro a la *salida* del Congreso –en concreto en las dos primeras reuniones de la Ejecutiva entrante– que él mismo se encargaría de redactar las actas, y de que no se permitiría mayores interferencias en el quehacer de la dirección ni posibles filtraciones interesadas desde la Ejecutiva, tras recordar a todos y cada uno de los nuevos miembros de la dirección el artículo 6 de los Estatutos, con respecto al secreto de las deliberaciones de la CEC⁷³.

⁶⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT defenderá la moderación salarial, como fórmula de solidaridad, en la negociación de los convenios colectivos”, *El País*, 5 de junio de 1983.

⁷⁰ En el número 313 de *El Socialista*, correspondiente a los días 8 y 14 de junio, Redondo puño en alto coparía la imagen de Portada, bajo el título: “Autonomía y responsabilidad”. En un firme editorial de apoyo en el mismo número se podía leer en su último párrafo: «Sobre todo, el Partido Socialista y el Gobierno cuentan con el respaldo de la Unión General de Trabajadores –aparte de que en algunos momentos ese respaldo pueda ejercerse también críticamente, como corresponde a un sindicato de clase–, porque la gran central obrera es ese columna vertebral del movimiento sindical en España y siempre será, según se ha reafirmado en el Congreso, ‘el bastión más seguro y el último reducto del movimiento socialista’». Editorial, “Sindicato de clase, economía y política”, *El Socialista*, nº 313, (1983), p. 7.

⁷¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT ha dado un cambio hacia delante en su política sindical, según algunos sectores”, *El País*, 6 de junio de 1983.

⁷² La CEC entrante estaría conformada por los siguientes hombres: Secretario General, Nicolás Redondo; Organización, José Antonio Saracíbar; Administración, Paulino Barrabés; Acción Sindical, José Luis Corcuera; Acción Institucional, José María Zufiaur; Internacional, Manuel Simón; Imagen, Miguel Ángel Ordóñez; Formación, Juan Marrasa; Emigración, Jesús R. Mancho; Secretario Confederal, Manuel Chaves y José Luis Daza. Datos extraídos de, VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, op.cit., p. 317.

⁷³ A la salida del 33º Congreso las relevantes actas de la CEC de UGT pasarían a tener un formato y contenido sustancialmente diferente. Por un lado, estarían numeradas correlativamente, aunque ello no evitaría ni *ciertos vacíos* ni *saltos temporales* entre diferentes actas intercaladas. Asimismo se añadiría un último apartado titulado “Acuerdos”, a modo de resumen Ejecutivo de cada reunión. Como se ha adelantado, en la primera reunión de la nueva CEC el 7 de junio, más allá de valorarse «positivamente el recién celebrado XXXIII Congreso, especialmente el contenido de las ponencias y sobre todo la de política sindical», y de «considerar urgente el buscar una fórmula de funcionamiento para el Comité Confederal que permita solventar los problemas que se detectaron durante el análisis de su gestión por el Congreso»; se aprobaría el nuevo Reglamento de Funcionamiento de la CEC, recordando el «el debido

Por más, que la UGT quisiera quitar peso político a la nueva estrategia adoptada, no tardarían en llegar las valoraciones de todo signo⁷⁴. De “cambio radical” llegaría a calificar *El País* la modificación de la nueva estrategia adoptada. No era para menos, en verdad. Con evidente alborozo sería bienvenido tal *cambio* político-sindical por parte del citado medio de comunicación, quien afirmaría como la “UGT, además de la madurez demostrada al enfrentarse claramente contra una política de rentas basada en la demagogia y la utopía, se ha planteado un reto frente a sus propias bases”.

No faltarían en aquella ocasión las alabanzas por doquier por tan magna decisión. Ahora bien, como recordaría el propio *El País*, a la central socialista se le presentaban una no fácil tarea: “convencer tanto a sus militantes como al conjunto de los trabajadores de la necesidad la bondad de sus tesis”⁷⁵. No erraba pues, en tanto aquel *peligroso* acercamiento a las tesis pro-gubernamentales, les obligaría a una “especie de bautismo” como los *necesarios y nuevos creyentes* de la filosofía de la política económica de los ejecutivos socialistas⁷⁶. Más pronto que tarde, las nuevas tesis tendrían que afrontar complicadas pruebas en el terreno negociador, con no pocos –como previsibles– costes en términos organizativos como afiliativos.

El periodo estival del ochenta y tres empezaría marcado por tres procesos interrelacionados con el desarrollo del *programa* modernizador socialista: a) la elaboración de los Presupuestos Generales para 1984; b) la búsqueda de un nuevo Acuerdo Interconfederal; c) un amplio paquete de reformas legislativas, en donde la reforma de la Seguridad Social y del mercado de trabajo tendrían un protagonismo cada vez más destacado. Introducida en la agenda política la cuestión de la flexibilidad en términos genéricos, se iniciaría, a continuación, una etapa de *globos sondas*. De esta forma, el lunes 13 de junio daba comienzo la primera ronda de negociaciones al respecto, encabezada por el propio Presidente Gobierno así como los principales ministros implicados –Economía, Trabajo, Industria...–.

Todo ello con una particularidad tan propia de la primera Legislatura de los ejecutivos socialistas. Nos referimos al reparto de papeles entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo a la hora de ir dando a conocer, en pequeñas dosis, los preparativos de la futura

secreto de no reserva de las deliberaciones». En la siguiente reunión, se aprobaba como «las actas de las reuniones de la C.E.C. sean elaboradas por el Área de Organización». Otro de los cambios más sustanciales que se pueden observar, en adelante, es la cada vez más evidente falta de transparencia e información de las mismas, en donde de forma casi sistémica los puntos más controvertidos apenas aparecen resaltados en el mejor de los casos, junto con otros pequeños detalles –el paso del empleo del término Gobierno por el de Administración–. AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 1. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 7 de junio de 1983”, sig. 002251-003; AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 2. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 7 de junio de 1983, sig. 002251-003.

⁷⁴ A nivel interno se hablaría de un Congreso *clave*. Así en el siguiente editorial de *Unión* se emplearían los siguientes términos: «La acción sindical, pues, va a ser difícil y compleja. Necesitaremos mucha imaginación para adecuarnos a la grave situación por la que pasamos. Por eso es tan importante que UGT mantenga una postura crítica ante el Gobierno, para que esta oportunidad única que se nos presente sea un logro para los socialistas y nunca un fracaso». Más claro quedaban los objetivos perseguidos en el siguiente párrafo: «En prioritario conseguir el apoyo del Gobierno a nuestro programa». Con mensaje voluntarista dirigido a los empresarios: «Es prioritario que los empresarios entren en razón y que comprendan que no se pueden mantener posturas cerradas, es necesario, totalmente imprescindible, que inviertan y ofrezcan algo a cambio en la negociación colectiva, en la práctica empresarial». Editorial, “XXXIII Congreso: la clave para una etapa”, *Unión*, nº 44, (1983), p. 2.

⁷⁵ Editorial, “Congreso para la solidaridad”, *El País*, 6 de junio de 1983. Véase también aquí el examen de, ASTUDILLO RUIZ, Javier, “La trampa partidista...”, *op.cit.*

⁷⁶ Por su parte Javier Astudillo lo interpretaría de la siguiente forma: «Sin embargo, la dirección de la UGT ‘congeló’ sus demandas de política económica, y, en su primer congreso confederal tras la victoria socialista de 1982, celebrado en junio de 1983, centró su énfasis en sus objetivos sociales y no en los instrumentos de política económica para conseguirlos». Id., *Los recursos del...*, *op.cit.*

RET'84. Así pues, mientras que desde el equipo económico del Gobierno con Miguel Boyer a la cabeza se lanzarían no pocas propuestas de una *flexibilización* a ultranza; por parte del equipo del Ministro de Trabajo, Almunia de cabeza siempre visible, se tendería a matizar los alcances de los tres proyectos de reforma del mercado de trabajo en juego –la propia RET'84, la reforma del II Título de la Ley Básica de Empleo junto con la futura LOLS–. *Pack legislativo* que no estaba previsto, por cierto, en el programa socialista de no hacía menos de un año.

Otro rasgo característico de este tiempo sería la presentación de estos primeros bocetos en las reuniones de los grandes organizaciones de poder económico del país, tal y como sucedería, en adelante, en repetidas ocasiones⁷⁷. Gestos iconográficos que poco o nada casaban con la cultura socialista, y que a su vez alertaban a los propios agentes sindicales tanto por las formas como por los contenidos.

El mismo Nicolás Redondo no dejaba de apuntar a mediados de junio lo siguiente de cara al proceso de concertación que se abría entonces:

«A mí me preocupan las declaraciones que personas vinculadas al Gobierno vienen haciendo [...]. Y se dice, como recientemente hacía el subgobernador del Banco de España, que había que flexibilizar el mercado de trabajo y que los salarios eran muy altos. A mí, ésta me parece una mala política del Gobierno. Mis dudas respecto a la disposición del Gobierno sobre la concertación están basadas en las declaraciones contradictorias que he oído: unos dicen que el Gobierno no van a consensuar nada. Tendrá que aclarar qué quiere decir con eso, porque si se va a limitar a oírnos sin tener en cuenta nuestras opiniones, perderemos una oportunidad definitiva. Tienen que aclarar ciertas ambigüedades [...]. No es que el Gobierno esté en estado de gracia, pero aún no se ha abierto una brecha con el pueblo, que tiene una gran dosis de esperanza»⁷⁸.

Discrepancias de familia aparte ante las evidentes maniobras del Gobierno de cara a la opinión pública, la UGT tendría un papel de interlocutor básico frente al Ejecutivo. No sólo mantenía unas relaciones públicas y privadas extraordinariamente fluidas, sino que además tenía acceso antes que nadie a los propios planes gubernamentales. Ahora bien, a pesar de sus tesis programáticas congresuales tan favorables a la política de los socialistas en materia de negociación salarial –en un claro intento de no tensar la *correa de transmisión* Sindicato/Partido/Gobierno– desde el sindicato ugetista se mostraría su habitual rechazo, durante los primeros pasos de la concertación social, a una mayor flexibilización del mercado de trabajo por la vía de la contratación temporal, a lo que se sumaba su oposición a los planes de reconversión industrial⁷⁹.

Es sintomático que a pesar del esfuerzo programático y estratégico mostrado por la Unión General de Trabajadores en su XXXIII Congreso, se mantuviera una prudencial distancia, desde la salida del mismo en relación a las intenciones del Ejecutivo. Después de las primeras reuniones mantenidas en forma de *tanteo previo* durante el mes de junio –en concreto los días 13 y 29 de junio– entre el Ejecutivo y la propia central socialista, en donde tocarían, entre otros temas, el futuro PEMP, el plan de reindustrialización y los planes de contratación temporal; se optaría desde la CEC de UGT en dos reuniones, primero, examinar detenidamente las dimensiones del PEMP para tratar de encajarlo con la *oferta de solidaridad* emanada del Congreso ugetista; segundo, salir al paso de los iniciales intentos de Industria con respecto a la

⁷⁷ Noticia, Gustavo Matías, “Mañana empiezan los contactos para una posible concertación de los objetivos y reformas que prepara el Gobierno”, *El País*, 12 de junio de 1983. Allí se informaba como Joaquín Almunia había presentado, por vez primera, el conjunto de reformas en el Círculo de Empresarios.

⁷⁸ Entrevista, Nicolás Redondo, “Dudo que el Gobierno entienda nuestra política de solidaridad. Declaraciones de Nicolás Redondo, secretario general de UGT, a *El País*”, *El País*, 12 de junio de 1983.

⁷⁹ Noticia, “UGT, dispuesta a una política de moderación salarial con contrapartidas, según Nicolás Redondo”, *El País*, 14 de junio de 1983. Véase por lo demás lo apuntado en su momento en el apartado “6.2.1.1. Principios de realidad: el *Programa Económico a Medio Plazo*”.

reconversión, a través de una “nota de prensa” donde “reflejemos nuestros criterios de rechazo a la filosofía que el Gobierno plantea para el ajuste de las plantillas de dicho plan”. Los anteriores extractos corresponden a la reunión que se celebraría el martes 14 de junio⁸⁰.

En la siguiente que tendría lugar el jueves 30 de aquel mismo mes, se comenzaría a observar con preocupación, la necesidad de “perfilar más nítidamente nuestra Política Sindical, con el fin de conseguir una oferta global y clara que nos permita llevar la iniciativa sindical”. Ello tras más de una reunión con miembros del Ejecutivo, un contacto con Comisiones Obreras, y cara a elaborar una estrategia definida frente a un futuro escenario repleto de cuestiones de primer orden a negociar. Si importante era marcar la agenda política, tanto o más lo era “concretar nuestra posición sindical de cara a los próximos meses”, en una clara referencia de la necesidad de dotarse de una clarificación estratégica. Pero sobre todo lo que empezaba a preocupar a UGT, era llegar a un pre-acuerdo con el Ejecutivo antes de que se iniciara realmente el proceso negociador, valiéndose de sus íntimas relaciones con Gobierno y Partido. Una táctica, que una y otra vez, se pondría en marcha con muy escasos resultados prácticos.

De esta forma, y frente al entonces todavía denominado Plan Cuatrienal se “considera conveniente realizar una prospección con el propio Gobierno, a fin de ver las posibilidades que tenemos como sindicato de llegar a algún tipo de acuerdo”. Por lo demás, definidos y marcados los límites de la política de empleo, con especial incidencia en la problemática figura de la contratación temporal, asimismo se harían constar ciertas discrepancias ante los planes no del todo claros del Ejecutivo, para lo que se convocaría una reunión con las Federaciones que pudieran llegar estar más afectadas en el futuro al respecto⁸¹.

Un rechazo a la contratación temporal como uno de los escasos puntos de coincidencia con CC.OO. en un tiempo en que la división cuando no el enfrentamiento sindical, habían vuelto a ser una pauta común, tras la efímera convivencia –antes que lo pudiera entenderse o interpretarse como unidad de acción– que había predominado desde los últimos compases del ANE hasta la firma del AI’83⁸². En este clima, aunque no faltarían las reuniones formales entre las respectivas ejecutivas de ambos sindicatos, las diferentes estrategias sindicales y políticas, sumada a una malas relaciones personales entre el propio Redondo y Camacho, en nada facilitarían una potencial como real “unidad de acción”. Antes al contrario, durante estos años empeorarían sustancialmente hasta límites difíciles de prever por los propios responsables⁸³.

⁸⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 2. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 14 de junio de 1983”, sig. 002251-003.

⁸¹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 3. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 30 de junio de 1983”, sig. 002251-003.

⁸² La oposición frontal a una mayor flexibilización por parte de CCOO puede rastrearse en numerosos documentos. Por ejemplo, sobre sus nocivos efectos ya constatados, José Mateos Cortés y Enrique Lillo, abogados y asesores del sindicato, indicaban en las propias páginas de *El País* lo siguiente: «Así, un análisis de la evolución legislativa de los últimos años muestra la degradación progresiva de la estabilidad en el empleo [...]. Resulta erróneo, por tanto, afirmar que en la actualidad, y con la vigente normativa, no existe flexibilización de plantillas, concretada en la flexibilización en la contratación». Indicando además: «[A]firmamos que en los últimos años se está dando una generalización progresiva de la contratación temporal, que está facilitando, junto con el abaratamiento del despido, la sustitución de trabajadores fijos por eventuales y temporales [...]. Esta situación de creciente eventualización de las plantillas equivale a una situación permanente de período de prueba, lo que da lugar a una inseguridad en el empleo, con lo que esto supone de sumisión al poder del empresario y de freno a la acción sindical». Recordando finalmente unas palabras del propio Joaquín Almunia cuando estaba en la oposición y pronunciadas en el Congreso un 26 de junio de 1980: «Este es el modelo de lo que se pretende aquí: cada vez menos trabajadores con contrato indefinido, cada vez menos trabajadores con seguro de desempleo de 18 meses, cada vez más trabajadores que tengan que pasarse de un seguro de tres o seis meses a un contrato de seis o doce (en todo caso)». MATEOS CORTÉS, José y LILLO, Enrique, “El desempleo y la contratación temporal”, *El País*, 9 de julio de 1984.

⁸³ Noticia, “CCOO y UGT buscan una estrategia común en el plan cuatrienal”, *El País*, 7 de julio de 1983

Por su parte, Comisiones Obreras seguiría remarcando las distancias con respecto a los planes gubernamentales, y en concreto frente al Plan Cuatrienal, sobre el que apenas se tenía mayor información⁸⁴. Después de la carta enviada a mediados de mayo a Economía, se aprobaría un largo documento por parte del Consejo Confederal en el mes junio, tras los primeros contactos y tanteos. En un *informe* que abarcaba un amplio marco cronológico –hasta retroceder a tiempos de UCD– y revisado y actualizado su PSNPC, se seguiría manteniendo –no con cierta inocencia política o si prefiere falta de un análisis riguroso– como todavía predomina el “ala más socialdemócrata en la dirección del gobierno”. En todo caso, “los resultados, de momento, son una política económica en los seis primeros meses de su gestión, criticable y criticada por nosotros en su conjunto”. No descartando en el “próximo futuro” como se acentuarían los “rasgos no progresistas característicos de esta política”.

Examinadas las tensas relaciones con la UGT, más aún después de la celebración del 1º del Mayo, se entraría en materia advirtiendo como se estaba viviendo una “etapa crucial” de la nación:

«Lo que puede ventilarse en estos momentos es de qué lado se inclina la balanza. Si al amparo de su amplia mayoría parlamentaria el Gobierno opta por una alternativa neoliberal [...] considerando que de ese modo neutraliza la oposición de capitalistas y empresarios, la frustración de los trabajadores estará segura, aunque su traducción mayoritaria sea de apatía o inhibición».

Ahora bien, en relación a la oferta del Presidente del Gobierno, de entrada, se valoraba “lo que la oferta tiene de positivo”, al haber aceptado la posibilidad de ir a un *pacto social* de cuatro años de duración. Así pues, ¿qué camino adoptar ante la posibilidad de una concertación que podría limitar considerablemente los posibles movimientos de CCOO, al aparecer apegada a la política económica y social del Ejecutivo? No era baladí, pues, las mayores discrepancias y debates cuando no críticas o filtraciones interesadas a la prensa, vendrían por este mismo lado: concertar o no concertar, pactar o no pactar una política económica y/o laboral alejada de los postulados de Comisiones Obreras. Se aproximaba el momento de tomar decisiones.

Después de repasar todos los puntos de “discrepancia”, en donde se destacaba la “prórroga y posterior empeoramiento del decreto sobre contratación temporal”, también se observaban algunos puntos positivos como el proyecto de “incompatibilidades” o la “jornada de 40 horas”, pero el “balance lo hemos considerado en algunos aspectos esenciales francamente negativo”. Pero aquí el peso de la experiencia pasada reciente jugaría un papel clave, a la hora de no cerrarse, de entrada, a cualquier tipo de negociación. De esta forma: “[c]abe preguntarse si la perspectiva del Plan Cuatrienal va a cambiar este signo. Nosotros apostamos por que sea así”. La estrategia pasaba por “hacer girar hacia la izquierda la política del gobierno”. No parecía sencillo, especialmente cuando se pasaba revista a las múltiples declaraciones de González o Boyer en los últimos meses. Con todo, se afirmaba como había que evitar la tentación de afirmar como el “acuerdo es imposible de antemano”. Tocaba, pues, pasar a la ofensiva, más aún tras examinar las líneas generales del PEMP, en donde se incluía la flexibilización del marco de política de empleo.

Se mirara por donde se mirara las propuestas económicas del Gobierno, no sólo era “preocupante sino que sería rechazable por nosotros. Esto no tiene nada que ver con nuestra política de solidaridad”. No obstante, tampoco se podía rechazar, de antemano, asistir a las futuras convocatorias. Un marco que si bien no era el propicio al menos permitiría presentar la “alternativa concreta” de CCOO, más en concreto las líneas maestras del PSNPC. Entre otros puntos que se llevarían a debate, además de los diferentes “Planes de Fomento de Empleo para facilitar la contratación de jóvenes mujeres, minusválidos y trabajadores mayores de 45 años”; se apostaría por ir una revisión del ET, mediante una “derogación del Decreto sobre

⁸⁴ Por ejemplo, tras varios anuncios previos en *El Socialista* tan sólo se presentarían las líneas maestras en el último número de julio, y en donde tampoco se podía conocer mucho más que lo filtrado a la prensa diaria: “Ya hay Plan Cuatrienal”, *El Socialista*, nº 319, (1983), pp. 10-11.

contratación temporal derivado de él, para evitar el despido más fácil, más barato y la eventualidad que facilita esta Ley”.

Por tanto, Comisiones Obreras no se cerraba en banda, de entrada. E incluso admitía como para salir de la crisis se necesitaría una serie de sacrificios compartidos. “Pero esos sacrificios no pueden pedirse para, en el fondo, consolidar el sistema y descargar sobre los trabajadores y sectores menos favorecidos el peso de tales sacrificios”. Pese a todo, también se dejaría claro que el Gobierno podría optar por evitar “una verdadera negociación” y limitarse, en suma, a “escuchar nuestras opiniones y «tenerlas en cuenta»”. Transmitir un “mensaje de confianza” y negociar “con inteligencia” así como presionar con “firmeza” se constituían en los futuros ejes de actuación. Se ponía en marcha la estrategia para una “superación progresista de la crisis”, en la que debía huirse de “sectarismos fuera de lugar”, y evitar que lleguen a afectar a la organización las posibles discrepancias internas entre UGT y Economía⁸⁵.

Mientras tanto, a lo largo del mes de julio y de agosto de 1983 se irían concretando las diferentes posiciones en juego. Iniciada la *ofensiva económica* la Comisión Delegada para Asuntos Económicos –verdadero agente de agitación propagandística del proyecto modernizador socialista– iría precisando los perfiles de su ambicioso proyecto de reforma. Lo que primero se conocería como el *Plan Cuatrienal* y más tarde sería bautizado como el PEMP⁸⁶, remarcaba en uno de sus documentos básicos la imperiosa necesidad de una reforma estructural de mercado de trabajo en línea con la flexibilización⁸⁷. Los numerosos avisos previos, por fin, se materializaban *blanco* sobre *negro*, aunque todavía quedará no poco tiempo para su concreción definitiva. El Ejecutivo y concretamente Economía marcaban así los ritmos, pautas y contenidos de la futura reforma laboral. Por otro lado, se conjugarían aquellas “necesidades imperiosas” con las frecuentes declaraciones del Presidente del Gobierno reclamando nuevos sacrificios a la clase trabajadora⁸⁸. Declaraciones apoyadas por los expertos liberales de turno a la menor ocasión⁸⁹.

⁸⁵ AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión del Consejo Confederal del día 13-VI-1983”, sig. 2-06. Allí se adjuntaba el “Documento aprobado en el Consejo Confederal de CCOO del 13 de junio, acerca del Plan Cuatrienal de recuperación económica anunciado por el Gobierno” (pp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14). Consúltense también: AHT, CCOO-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal del día 24-V-1983”, sig. 003-00033.

⁸⁶ Sobre su posterior cambio de denominación los periodistas Rodolfo Serrano y Félix Monteiro señalarían: «El plan inicial, concebido para cuatro años, por imperativos de tiempo ha quedado reducido a tres (1984-1986), y su denominación ha tenido que adecuarse al del programa por no haberse materializado aún el Consejo Económico y Social, organismos al que, según la Constitución, corresponde la planificación en los campos de competencia». Noticia, Rodolfo Serrano y Félix Monteiro, “La negociación colectiva de 1984, condicionada por el papel de los sindicatos en el programa económico del Gobierno”, *El País*, 11 de septiembre de 1983.

⁸⁷ Noticia, “La Comisión Delegada para Asuntos Económicos debatirá hoy el plan a cuatro años propuesto por el Gobierno”, *El País*, 11 de julio de 1983; Noticia, “La comisión delegada estudió el plan económico cuatrienal”, *El País*, 12 de julio de 1983.

⁸⁸ Noticia, “El presidente del Gobierno pidió mayores sacrificios a la sociedad para salir de la crisis económica”, *El País*, 16 de julio de 1983. Noticia, Fernando Jáuregui, “El PSOE se muestra consciente de que se avecina una importante conflictividad social”, *El País*, 23 de julio de 1983. Y también, Noticia, “El Gobierno expuso al Rey sus planes sobre reconversión industrial y política de empleo y relaciones internacionales”, *El País*, 5 de agosto de 1983.

⁸⁹ «En la economía española, la rigidez del mercado de trabajo reviste una especial gravedad y, en consecuencia, constituye un objeto obligado de las reformas institucionales necesarias para el ajuste de la economía española y la superación de la crisis [...]. El comportamiento de los salarios en esos años tiene graves repercusiones sobre el comportamiento de los costes del trabajo por unidad de producto». Quien así se expresa era el economista, José Luis Malo Molina, quien concluía su *alegato reformista* de la siguiente manera: «Bajo estas coordenadas, la moderación de los salarios continúa siendo una pieza imprescindible de la economía y para alcanzar unas tasas de crecimiento que permitan superar la crisis y recuperar el empleo [...]. Para restablecer la rentabilidad de la economía española sobre bases más sólidas

El escenario, en cualquier caso, era de una muy relativa tranquilidad, teniendo presente los antecedentes. De hecho, a nivel sindical, al menos, se optaría por cierta prudencia, limitándose a marcar posiciones antes que de entrar en mayores debates y posibles enfrentamientos con la vista puesta en la previsible aceleración de los tiempos políticos a partir del mes de septiembre⁹⁰.

Ahora bien, lo que ningún agente implicado social, y más concretamente, sindical se podía esperar sería lo que sucedería a finales de julio, prácticamente a las puertas del mes de agosto, cuando España entera se marchaba fuera de vacaciones y la capital de la nación quedaba desierta y paralizada administrativa y políticamente. Como decíamos todo parecía marchar a su ritmo y sin sobresaltos. Por ejemplo, el 18 de julio, Nicolás Redondo, una vez que se había readaptado las tesis congresuales a las líneas maestras de la política económica del Ejecutivo, ofrecería una rueda de prensa para dar a conocer la *declaración estratégica* de UGT. En la misma explicaría las líneas centrales de la nueva política ugetista, bajo el axioma de la solidaridad: moderación salarial a cambio de un conjunto de contraprestaciones empezando por la reducción de la jornada, sumado a otra serie de acuerdos de empleo⁹¹. Nada nuevo, pues, junto con la *cálida* aceptación en los medios socialistas de la misma, más tras la celebración de una reunión del Comité Federal del PSOE –23 y 24 de julio– en donde se trataría de recuperar el impulso partidista mediante la elaboración del tantas veces citado *Documento de Estrategia* –que en breve se daría a conocer⁹²–. Pero en donde, ante todo, se dejaría claro que el Partido, en adelante, se volcaría en explicar –en concreto, a partir de septiembre– la política económica del Ejecutivo⁹³. Todo ello tras un larguísimo informe de gestión, a mayor gloria de la organización y en concreto de la dirección socialista⁹⁴.

Por aquellos mismos días la CEOE enviaría una concreta circular a sus organizaciones. Se afirmaría en la citada *circular*, a través de una retorcida –como premonitoria– lectura que, pese a la publicación de la Ley 40/1983 publicada en el BOE el 6 de junio⁹⁵ y que se haría efectiva a partir del 30 de julio, como la misma era compatible con lo acordado en los convenios para 1983, y que por tanto no tendría mayores efectos para el computo total de la jornada laboral en lo que restaba de año⁹⁶. En realidad, quedaba patente como la patronal había

de las que sustentaron el período de crecimiento o industrialización anterior a la crisis es necesaria una modificación sustancial del marco institucional y de las conductas de los ajustes del mercado». MALO de MOLINA, José Luis, “El mercado de trabajo durante la crisis”, *El País*, 27 de julio de 1983. Véase lo también apuntado en el Capítulo 9, *nota 1* y *nota 14*.

⁹⁰ Así se puede deducir de las dos únicas actas de la CEC de UGT durante el mes de julio hasta septiembre, en donde más allá de posicionarse frente al ‘Plan Cuatrienal’ o al Plan de Reindustrialización, se optaría por un cierto ‘relajamiento’ político-sindical. AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 4. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 5 de julio de 1983”, sig. 002251-003; AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 5. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 12 de junio de 1983”, sig. 002251-003.

⁹¹ Noticia, “UGT acepta la moderación salarial a cambio de reducción de jornada y creación de empleo”, *El País*, 19 de julio de 1983. Consúltese asimismo, “UGT apoya el plan cuatrienal”, *El Socialista*, nº 320, (pp. 30-31).

⁹² Junto con lo apuntado en el Capítulo 4, *nota 326*, véase su primer presentación pública en, “Ultimando el borrador del documento de estrategia”, *El Socialista*, nº 323, (1983), pp. 16-21.

⁹³ Véase, en primer lugar, AHFPI, PSOE-CF, “Acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité Federal (23 y 24 de julio de 1983)”, sig. Fc 3914.

⁹⁴ AHFPI, PSOE-CEF, “Informe de gestión al Comité Federal de la CEF (febrero 1983-julio 1983)”, sig. Fc 3984.

⁹⁵ Ley 4/1983, de 28 de junio, *de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días*. Véase, por lo demás, en el Capítulo 7, *nota 425*, Capítulo 8, *nota 379* y *nota 380* y en el Capítulo 9, *nota 485* y siguientes.

⁹⁶ Noticia, “Jornada de 40 horas”, *El País*, 19 de julio de 1983.

aceptado el AI'83, como un mal menor, esperando poder darle la vuelta en la primera posibilidad que se presentase.

Lo que a ninguno de los participantes se les había olvidado eran todos los esfuerzos que había conllevado la firma del Acuerdo Interconfederal para 1983. En un tablero de juego, altamente inestable, más tarde vendrían las declaraciones de González en marzo, la decisión de Trabajo de mayo sobre contratación temporal. Medidas o decisiones frente a las cuales UGT daría muestras de una enorme contención a la par que de *resignación*. Por estas circunstancias descritas, la nueva decisión de Trabajo del viernes 22 de julio de dar la razón jurídico-técnica a la par que política a la CEOE, con respecto a cómputo de la jornada anual, desataría las más duras críticas que desde el sindicato socialista se escucharían durante 1983. Así aquel mismo día, se daba a conocer las *Instrucciones de la Dirección General de Trabajo, de 22 de julio de 1983, para el visado de calendarios laborales, en cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley 4/1983, de 29 de junio*. La elección de la fecha por parte de Trabajo no era casual. Más aún, tal forma de proceder a la hora de publicar en el BOE medidas impopulares o sensibles, generalmente relacionadas con el mundo del trabajo o también la cuestión socialista, se convertiría en habitual a lo largo de la época socialista.

Asimismo parecía repetirse la historia del RD 3887/1982: a saber, una inicial posición política congruente con las bases programáticas, para a los escasos meses dar marcha para a través de un simple *Orden* o todavía más una *Instrucción*, que ni siquiera necesitaban llevarse al Consejo de Ministros o debatirse en el Congreso. Igualmente se volvía a cernir la sospecha de cierta connivencia entre Gobierno y patronal ante lo indicado en la *circular* de la CEOE y la *instrucción* de Trabajo, con un margen de diferencia de menos de 72 horas⁹⁷.

Sin ningún género de duda, tal forma de proceder sería un fuerte varapalo para la UGT que tantos esfuerzos y energías había gastado vanamente desde el minuto cero de la inauguración de la época socialista, en que las 40 horas fueran una realidad laboral en 1983. El mismo Redondo que no hacía ni una semana que había salido a apoyar públicamente al Ejecutivo, denunciaría, el jueves 21, la “falta de sensibilidad sindical del Gobierno”. Escortado por Zufiaur⁹⁸, asimismo, se criticaría la clara interconexión de intereses entre Gobierno y patronal, de cara a que los “trabajadores que pactaron en convenio horas de trabajo superiores, en cómputo anual, a la media anual de 40 horas semanales (1.860 horas), se mantienen este año en esa situación”. En un *radicalismo verbal* sobrevenido, se advertiría como se había incumplido el programa electoral, avisando de “que ejercitaremos las acciones jurídicas y sindicales oportunas”⁹⁹. Lo que traducido, en términos ugetistas, significaba la *amenaza* de posibles movilizaciones. Pero más allá de esta cortoplacista amenaza que no se plasmaría en

⁹⁷ Por su parte Oliet Palá directamente ha hablado de un ‘pacto secreto’ entre Gobierno y sindicatos, así como recordaba que la *instrucción ministerial* sería recurrida por UGT en los juzgados. OLIVET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 151, nota 40. Por cierto, UGT ganaría ese contencioso y así lo anunciaría a finales de 1983 y principios de 1984 en las páginas de *Unión*.

⁹⁸ Un mes largo después publicaría artículo de opinión en las páginas de *El Socialista*, en donde explicaría paso por paso como se había negociado la ley, la tramitación parlamentaria hasta las *instrucciones* de julio, a la par que defendería la posición de UGT. Todavía eran tiempos en que las posibles divergencias dentro de la familia podían tener espacio en dichas páginas: ZUFIAUR, José María, “La ley de la jornada máxima, rebajada”, *El Socialista*, nº 324, (1983), pp. 27-28.

⁹⁹ No deja de ser sorprendente las palabras y las hipótesis que utilizaría Alfonso Guerra para referirse a esta cuestión en sus *memorias*: «La difusión de la noticia provocó una reacción airada del secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, que poco menos que acusaba de traición al Gobierno porque se ‘retrasaba’ seis meses la jornada de cuarenta horas. Realmente me chocó que después de esperar un siglo para lograrlo se convirtiera en un *casus belli* una diferencia de seis meses. Intuía la guerra. Se repetían las ocasiones en las que detalles de una trascendental acción de gobierno eclipsarían la importancia de la medida. En esta ocasión, la reducción de la jornada hasta las cuarenta horas semanales, después de un siglo, y la ampliación de las vacaciones hasta treinta días, decisión histórica adoptada en los primeros días del Gobierno socialista, se menospreciaban porque la entrada en vigor fuera seis meses antes o después». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., p. 69.

acciones concretas, también quedaba claro como desde Trabajo se había vulnerado a su antojo el artículo 9.3 de la Constitución¹⁰⁰. Tal y como se haría, por ejemplo, unos meses después cuando se decidiera unilateralmente ampliar el mandato de los delegados sindicales de 2 a 4 años¹⁰¹.

Para rematar la *faena*, Almunia convocaría una rueda de prensa al día siguiente. En otro nuevo gesto de *prepotencia* y *altanería* declaró, que tal y como estaba la situación económica, veía complicado en extremo llegar a las 40 horas en los tres siguientes años. Y sin escrúpulos políticos afirmaría como, en todo caso, se trataba de una cuestión encomendada a la “negociación colectiva”. No se trataba, según sus palabras de “falta de sensibilidad sindical”, sino como en caso de no haber adoptado tal decisión hubiera sido una “falta de sensibilidad jurídica”. Todavía más seguro se mostraría con UGT: “hay desacuerdo en esta interpretación, pero no creo que ello pueda cambiar las relaciones entre el Gobierno y UGT, el agua no llegaría al río”¹⁰². No se equivocaría, por más que hubiera tenido que retorcer la normativa al respecto, dando diferentes explicaciones según el medio y receptor oportuno¹⁰³.

Por cierto, en la citada ocasión *El País* se ahorraría citar alguna que otra declaración del señor Ministro de Trabajo en dicha comparecencia pública. Por ejemplo, para lo que *El País* era simplemente cuestiones índole económica. Pero para otros medios, las mismas tenían otra clara lectura cuando se examinan algunas otras afirmaciones de Almunia: “a partir de esta regulación [...] aunque dada la actuación situación española y previsión de incremento de los salarios es necesario un esfuerzo adicional de moderación salarial en términos de costes laborales unitarios-hora que no comprometan la competitividad de nuestras empresas”¹⁰⁴. Por lo que también se pudo conocer –en este caso tan sólo a través del *ABC*– la siempre astuta y bien informada CEOE había lanzado la citada circular, a partir de la localización de un *minúsculo*

¹⁰⁰ «Artículo 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». CE.

¹⁰¹ Noticia, “UGT denuncia «la falta de sensibilidad sindical del Gobierno» en la jornada de 40 horas semanales”, *El País*, 22 de julio de 1983.

¹⁰² Noticia, “El ministro de Trabajo considera que será muy difícil recudir la jornada por debajo de las 40 horas en la legislatura”, *El País*, 23 de julio de 1983.

¹⁰³ Por ejemplo en las páginas de *El Socialista* el asunto pasaría prácticamente inadvertido en los siguientes números. En cualquier caso, sorprendería la vehemencia mostrada en el número 318 correspondiente a los días 13 al 19 de julio contra la CEOE, ante su pretensión de denunciar todos los convenios por el tema de la jornada laboral, lo que se considera como una «actitud obstruccionista». No sólo pues, al igual que sucedía a quien se opusiera al Ejecutivo –caso de CCOO– se le acusaría de llevar una *estrategia política* o de ser *demagógica*. Ni una sola página, insistimos, se dedicaría en los siguientes números a las *Instrucciones de Trabajo*. “¿A qué juega la CEOE?”, *El Socialista*, nº 318, (1983), p. 32.

¹⁰⁴ No hacía mucho tiempo que desde las páginas de *El Socialista*, Manuel Chaves defendería como la reducción a las 40 horas no afectaría a la competitividad ni a la productividad, trayendo a colación el debate parlamentario correspondiente: “Solo AP-PDP contra las 40 horas”, *El Socialista*, nº 301, (1983), pp. 29-30. Una cuestión que, por cierto, desaparecería de las páginas del citado medio en los siguientes meses. En el número 322 –correspondiente a los días 10 al 17 de agosto– en otro *milagro* de la ‘dialéctica socialista’ se sería capaz de trazar en una nota editorial un completo cuadro de la marcha de la economía, sin citar el tema de las 40 horas. Pero lo realmente interesante era la cada vez más abierta defensa de la *lógica liberal* del diseño económico del Ejecutivo, que pasaba por proteger y animar la inversión privada. A lo que se añadiría, además, la *baza política* de la ‘política de acoso’ de que era *víctima* el Gobierno: «Para ello se requiere un incremento de la productividad, lo que exige la disciplina social más estricta posible, y el esfuerzo solidario de todos los sectores. La política económica desarrollada por el Gobierno socialista ha dado innegables frutos positivos. Por nada y por nadie se va a torcer su curso. Tomen nota quienes anteponen sus intereses políticos particulares, fomentando movilizaciones incongruentes y desafortunadas, al interés general de la nación». Editorial, “Economía: cambio de tendencia”, *El Socialista*, nº 322, (1983), p. 7.

error en la publicación de la Ley 4/1983, y que, casualmente, también quedaría subsanado aquel mismo día en el BOE. Un error, para más señas, en la colocación de una coma¹⁰⁵.

Más calmados los ánimos desde la Ejecutiva de UGT se enviaría una *carta-circular* firmada por el propio Redondo el 27 de julio a las Federaciones Estatales de Industria y a las Uniones Territoriales. Y es de interés la misma por su inusual dureza con el Ejecutivo, a quien se le criticaría abiertamente por intervenir en una “polémica [...] sin estar obligado a ello e incluso atribuyéndose competencias de la que carece”. Por tanto, “El Gobierno a través del Ministerio de Trabajo ha tomado partido en un tema conflictivo para las partes sociales”. No sólo, pues lejos de argumentos ofrecidos por el propio Almunia, aquella decisión reflejaba una “opción más política que técnica; y la UGT se ha opuesto a este posicionamiento denunciando su carácter regresivo y antijurídico”.

No cabía duda alguna en tal caso: el Gobierno se había alineado con la CEOE, lo que, sin duda, era un “profundo error político que va a empañar la mayor conquista realizada hasta ahora por este Gobierno”. Sin posibilidad de revertir la situación, tocaba pues criticar al Gobierno, eso sí, dejando claro que seguiría trabajando para el efectivo “cumplimiento de su programa”. En un nuevo ejercicio de constricción se llamaba a la “serenidad”, al mismo tiempo que llevaba a cabo una interesada como burda comparación entre la necesidad de seguir defendiendo al Gobierno para defender la democracia:

«No [queremos] debilitar al Gobierno, ni es esa nuestra intención, pues nuestro compromiso de apoyo está en relación directa con la defensa de la democracia y la defensa del Programa del Partido, y ambos requieren y justifican las discrepancias puntuales que no pueden significar en ningún momento la confrontación total. Nuestro compromiso de fondo es con la democracia (avanzada), y con el cambio, y aspiramos al triunfo del Gobierno pues sabemos que su fracaso es el fracaso de los trabajadores»¹⁰⁶.

Tras la experiencia, en cierta parte traumática, para la UGT, aquel agosto no sería precisamente tranquilo. Sin prácticamente respiro a lo largo del citado mes se irían lanzando nuevos *globos sondas* —y lo que bien podría denominarse como nuevos *discursos del miedo*¹⁰⁷— en relación a los futuros planes económicos del Ejecutivo. Mensajes que vendrían a reforzar una *idea-fuerza* cada vez más palpable: la *defensa a ultranza* de la necesidad de no concertación para sacar adelante el PEMP¹⁰⁸. Tesis siempre defendida por Boyer y su equipo

¹⁰⁵ Noticia, Amancio Fernández, “El ministro de Trabajo pide esfuerzos adicionales de moderación salarial”, *ABC*, 23 de julio de 1983. Lea con atención: Corrección de erratas de la Ley/1983, de 29 de junio, *de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días* [B.O.E. 23 de julio de 1983]. A partir de la cual el párrafo segundo de la disposición transitoria de la citada normativa quedaba redactado de la siguiente forma: «La puesta en práctica de la jornada que se establece en la presente Ley no afectará a la ordenación global de la jornada de trabajo existente en las empresas a la entrada en vigor de esta Ley, sino exclusivamente a su duración, salvo pacto en contrario». En la versión original se podía leer: «La puesta en práctica de la jornada que se establece en la presente Ley, no afectará a la ordenación global de la jornada de trabajo existente en las empresas a la entrada en vigor de esta Ley, sino exclusivamente a su duración salvo pacto en contrario». Ley 4/1983, de 28 de junio, *de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días*.

¹⁰⁶ AHFFLC, UGT-CEC, “Carta-circular”, Madrid, 27 de julio de 1983, sig. AI-198-04. Localizada dentro del Fondo de Secretaría de Acción Institucional.

¹⁰⁷ Noticia, Gustavo Matías, “El programa económico y los Presupuestos del Estado para 1984 pueden evitar el peligro de insolvencia de España”, *El País*, 23 de agosto de 1983. Se decía en aquella crónica, que recogía diversas intervenciones de parte del equipo del Gobierno acerca del PEMP, lo siguiente: «Cortar estos y otros desequilibrios, que pondrían a España en peligro de insolvencia ‘no más allá de 1984’ sometiéndola a un indeseado plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional, han servido de base para los proyectos de medidas de ajuste contenidas en los borradores del programa económico gubernamental a medio plazo y los Presupuestos del Estado para 1984».

¹⁰⁸ Rápidamente desde la UGT se criticaría este radical cambio de posición al expresar «el rechazo explícito por parte del ministro de Trabajo del término negociación del plan económico cuatrienal, y más

económico en este tiempo. Una modificación sustancial que, a la par, que expresaba una posición de fuerza se convertía en el más claro ejemplo del poder del equipo de económico del Gobierno, de que podía hablar, dialogar o lo que hiciera falta, pero *no negociar* lo que se consideraba como no cuestionable. Una tesis a la que el Ministro de Trabajo se sumaría durante en un breve tiempo.

Hablamos antes de que los socialistas adoptaran por costumbre anunciar sus grandes medidas en los centros de poder, generalmente, bien acompañados de empresarios, banqueros y otros capitalistas de renombre. Aunque no siempre sería así, ha de destacarse su siempre preferencia por los “lugares con clase” para anunciar las grandes líneas de su programa económico. Anuncios que, rara vez, tendría lugar en ámbitos relacionados con el mundo del trabajo¹⁰⁹. De esta forma, a lo largo de los propios gobiernos socialistas uno de los lugares centrales para tales empresas sería la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, durante sus cursos de verano. Aquel lugar tenía sus claras ventajas. Primero, las estrictamente estéticas. Segundo, la de marcar la agenda para el inicio del curso político que daba comienzo en septiembre.

De este modo, en aquel verano de 1983 esta *nueva costumbre* estético-política comenzaría a tomar forma y contenido. En nuestro caso, el más sonado anuncio tendría lugar en un seminario que llevaría por título: *Asignación de recursos colectivos en una sociedad democrática*. Nos situamos a fines de agosto de 1983. Tras prácticamente dos semanas largas sin tener noticias de los planes económicos del Gobierno, y tras manifestar sus reticencias a una posible concertación social que no terminaba de arrancar; destacados dirigentes gubernamentales del equipo de Miguel Boyer lanzarían el gran órdago en relación al mercado de trabajo cuando ni siquiera había un *papel* con membrete oficial de Economía y/o trabajo sobre la mesa, ni se habían abierto estrictamente cualquier tipo de negociación.

Tan envalentonados y crecidos así como seguros de sus fuerzas hablarían en aquella ocasión de los considerables beneficios de avanzar hacia el despido libre. A pesar de todos los matices con las que se acompañaría aquella propuesta vinculada al PEMP, aquel *globo sonda* encendería todas las señales de alarma. Si hasta el momento se había hablado genéricamente de una mayor flexibilidad, de contratación temporal, de moderación social –temas todos ellos potencialmente conflictivos– en ningún momento se había planteado *tocar* el mecanismo de salida del mercado de trabajo. Principal muro defensivo de los trabajadores, que ningún gobierno democrático o no, se había siquiera atrevido a plantear no sólo por su impopularidad, sino por el alto de riesgo de que se desatara un conflicto obrero generalizado¹¹⁰.

En concreto, lo que se esbozaría en aquella ocasión sería un conjunto de facilidades para el despido libre de determinados colectivos con los jóvenes en primer lugar. Ello en un momento en donde lo que no dejaba de producir, precisamente, eran cientos de despidos diarios, que demostraban por sí mismos como no había mayores obstáculos para despedir. Otra cuestión era su coste.

Destacó en su día –en concreto el martes 23 de agosto– más de una crónica como aquella propuesta por parte de los redactores del programa económico, “en algunos casos han

en concreto, en relación con los temas de Seguridad Social, supone una marginación inconcebible de quienes, con sus cuotas, contribuyen mayoritariamente a la financiación de la Seguridad Social». Noticia “UGT critica la declaración de Almunia sobre la reforma de la Seguridad Social”, *El País*, 10 de agosto de 1983.

¹⁰⁹ Nos remitimos aquí a los múltiples ejemplos expuestos a lo largo del Capítulo “7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de crecimiento”. Véase, por lo demás, también lo apuntado en la *nota 117*.

¹¹⁰ Un aspecto este que sería destacado por Marcelino Camacho en aquellos ajetreados días: «Nos encontramos con un Gobierno que no tiene voluntad de cambio [...] y realiza una política en lo económico y social que es más reaccionaria que la de UCD». Noticia, “Las centrales sindicales, contrarias a la introducción del despido libre”, *El País*, 25 de agosto de 1983.

parecido excesivas a [ciertos] niveles de Gobierno”¹¹¹. Ciertamente o no, se había presentado en el terreno menos pensado y en el momento político más oportuno un programa de máximos que condicionaría, en adelante, las posibles negociaciones. Los siempre *hábil* *estrategas socialistas* volvían a evidenciar sus dotes mediáticas. El impacto de aquella *filtración* fue tal, que según Almunia –en concreto en sus *memorias políticas*, en donde directamente obvia los acuerdos sobre el mercado de trabajo de noviembre de 1983¹¹²– advertiría como tal anuncio finiquitaría las posibilidades de un futuro AI’84. Así lo describió en su día:

«En pleno mes de agosto, se filtró el contenido de un documento elaborado en el Ministerio de Economía que hacía alusión a la necesidad de introducir más flexibilidad laboral, lo que fue confirmado por algunos altos cargos del ministerio en declaraciones a la prensa. Redondo volvió de vacaciones, y nada más pisar la pista de Barajas arremetió contra esos presuntos propósitos gubernamentales. Durante las semanas siguientes se confirmó que no era posible prolongar los acuerdos salariales a escala nacional, que venían teniendo vigencia desde 1979»¹¹³.

Con el efecto del *shock* todavía presente en los días siguientes se conocerían más detalles acerca de aquella propuesta:

«El despido libre como fórmula para agilizar la contratación afectaría fundamentalmente a las empresas de nueva creación –según informaba Rodolfo Serrano–. Esta medida, que se incluiría en el Programa Económico del Gobierno para 1983-1986, forma parte del conjunto de actuaciones que en materia de flexibilización del mercado de trabajo está siendo estudiado por los redactores del citado programa. El Ministerio de Trabajo está elaborando nuevas disposiciones en esta área que amplían los límites establecidos hasta ahora y que están siendo objeto de un fuerte debate interno dentro de la administración».

No sólo se pretendía tocar el tema del despido, sino ampliar sin límites la contratación temporal, según la misma crónica. “Las nuevas medidas crearían una nueva figura de contrato temporal: el *contrato temporal ilimitado*. Con ello se intentaría contrarrestar el temor empresarial a nuevas iniciativas”¹¹⁴. Una extensión de la temporalidad que tenía un destinatario muy concreto: los jóvenes y los parados mayores de 45 años. A lo que se añadiría la *filtración* de controversias y debates dentro del Gabinete y concretamente en el Ministerio de Trabajo

¹¹¹ Noticia, Gustavo Matías, “El programa económico del Gobierno dará mayores facilidades para el despido y prevé una mayor moderación salarial”, *El País*, 24 de agosto de 1983.

¹¹² De hecho, quien fuera el Ministro de Trabajo y Seguridad Social comete varios errores, mezclando la finalización del AES y la RET’84. No sólo se equivocaría de fechas, sino que presenta un relato que no se corresponda con la realidad. «En otoño posterior a la firma del acuerdo fue tranquilo desde el punto de vista social. En el ministerio trabajamos para desarrollar cuanto antes los compromisos más urgentes que se derivaban del AES, y en pocas semanas se aprobaron por el Gobierno los decretos sobre contratación temporal y nuevas modalidades de contratos. Además, envié al Congreso la reforma del Estatuto de los Trabajadores y del sistema de protección al desempleo». ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, op.cit., pp. 176-177. En otras declaraciones, en cualquier caso, explicaría como la introducción de los contratos temporal «en aquel momento [...] eran una tabla de salvación para muchos empresarios que se atrevieron a contratar; y de hecho, inmediatamente después de la entrada en vigor de aquellas medidas y coincidiendo además con el inicio de la reactivación económica se produce la recuperación del empleo, que dura hasta los años 91 y 92». MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, op.cit., p. 122.

¹¹³ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, op.cit., pp. 169-170.

¹¹⁴ Al día siguiente el mismo periodista, Rodolfo Serrano, informaba de lo siguiente: «los técnicos de este departamento estudian la posibilidad de eliminar completamente los topes: cualquier empresa, independientemente del número de trabajadores que cuente en su plantilla, podrá suscribir cuantos contratos temporales crea necesario». Noticia, Rodolfo Serrano, “La contratación de eventuales no estará condicionada por el número de fijos de cada empresa, según el proyecto de Trabajo”, *El País*, 26 de agosto de 1983.

sobre la efectividad o no de tales medidas¹¹⁵. Lo que todavía hoy no está aclarado, al menos de forma plena, es si desde Trabajo se llegaría a compartir o no, en algún momento de aquel verano, las propuestas de Economía en materia de *despido libre*¹¹⁶. Por cierto, Alfonso Guerra en sus *memorias políticas* afirmaría como desde el Ejecutivo no tenía ninguna información al respecto de las propuestas de Economía, culpando a Boyer de paso¹¹⁷.

Cuando los sindicatos tras dos meses de la primera reunión de cara a una hipotética apertura de un proceso negociador, todavía no habían recibido ningún informe acerca del programa económico, el Gobierno filtraba a los medios el primer documento de trabajo de reforma laboral. Una forma de actuar, de entender el oficio de la política, que también se haría común durante los tres lustros socialistas. En un goteo informativo que parecía no tener fin, el viernes 26 de agosto, a través de un clave de la agencia *Europa Press*, se daba a conocer el contenido de un informe del Gabinete Técnico del Ministerio de Trabajo que bajo el título, *Propuestas en el ámbito de la política de empleo para el período 1983-1986* contenía las principales aristas de la futura reforma del Estatuto de los Trabajadores. Aquel documento remitido, a su vez, a la Secretaría de Estado de Planificación constataría los temores de los sindicatos de clase. No se trataba ya de declaraciones de *ningún agente radical* del equipo del económico, sino de propuestas *blanco sobre negro* por parte del equipo del antiguo asesor de la UGT, Joaquín Almunia. A falta del documento original –el cual no podido ser consultado en el Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en tanto se desconoce de su

¹¹⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “La posibilidad de un despido libre en las nuevas empresas origina un fuerte debate entre Gobierno y sindicatos”, *El País*, 25 de agosto de 1983. Un aspecto que también era destacado en un editorial de *El País*: «[E]l vivo debate dentro del Gobierno en torno a estas medidas flexibilizadoras, que rompen con la rigidez heredada del régimen anterior, delata una parte de las contradicciones existentes entre la política defendida por el partido socialista en sus programas y actuaciones públicas cuando estaban en la oposición y el comportamiento a que le conduce el ejercicio práctico del poder». Editorial, “Flexibilidad o rigidez en el mercado de trabajo”, *El País*, 26 de agosto de 1983.

¹¹⁶ Según recogería Emma Cerviño la posterior «decisión de no flexibilizar el despido supuso el enfrentamiento de algunos miembros del Ministerio de Economía con el Ministerio de Trabajo. Y es que alguno de los miembros de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, entre los que se encontraba Antonio García de Blas, consideraran que había que flexibilizar el despido. El Ministro de Economía, Miguel Boyer, aunque estaba también a favor de esta medida, su mayor preocupación era la contención de crecimiento de los salarios». Más aún la autora recogería dos valiosos testimonios al respecto. En concreto el de Almunia y el de Espina en donde se negaría la mayor, es decir, que desde Trabajo se hubiera pensado siquiera la posibilidad de *optar* por la *opción* de Economía: «Nos parecía que en aquel momento si se abría el portillo de los ya ocupados, salían todos. Tal y como estaba en aquel momento la economía española con una crisis sin digerir, una recesión que venía de atrás, con unos trabajadores desempleados con unos niveles de formación bajísimos, por todas estas razones, si se hubiese abierto la compuerta en el año 84, hubiese sido tremendo». Las anteriores palabras corresponde a Almunia. Y Espina plantearía lo siguiente: «En ese momento no se atreve a pedirlo casi ni siquiera la CEOE. Con la incertidumbre que había con todos los procesos de reestructuración en las empresas que todavía estaban en marcha, era absolutamente impensable. Ahí queda otra posibilidad, flexibilidad, sí, pero a la entrada. La flexibilidad de la salida en el contexto en el que estamos, bajo ningún concepto». CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, op.cit., pp. 165 nota 13 y 164.

¹¹⁷ «Se hizo frecuente la asistencia de altos cargos del Gobierno, directores generales, secretarios generales de los ministerios que acudían a Santander a exponer los proyectos que ellos tenían en estudio. Sus anuncios, sobre todo en materia económica, suscitaban inmediatamente polémica reflejada en los periódicos sobre los proyectos del Gobierno. La verdad es que el Ejecutivo no tenía ningún conocimiento de aquellos estudios y se encontraba obligado a pasar el verano desmintiendo lo que los altos cargos anunciaban en Santander. Algunos opinaron que era una técnica depurada y sibilina de comprobar la temperatura del cuerpo social mediante globos sonda de los que el Gobierno no se hacía responsable. Es una ley inexorable: siempre se concede al adversario una capacidad estratégica superior a la realidad. Sin embargo, no sería justo descargar sobre los cuadros intermedios la utilización de la UIMP en la creación de problemas políticos. Porque el hecho es que la veda fue abierta por el propio ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los...*, op.cit., p. 174.

existencia, al menos, a día de hoy— lo que en aquella *nota de prensa* se venía a resaltar era la asunción por parte del gabinete de Trabajo de los principios e ideología de la flexibilidad liberal, como podía detectarse tras el diagnóstico presentado acerca del problema del desempleo. Nada nuevo, en cualquier caso, si tenemos presente lo que había ocurrido previamente en mayo de aquel mismo año. Así se hablaba de la necesidad de “evitar algunas de las rigideces existentes en materia de extinción del contrato laboral”, destacando entre otras cuestiones:

«Los problemas fundamentales que tiene planteado el actual sistema español de regulación del despido no siempre se corresponde con el coste de la indemnización, aunque ésta sea más elevada en términos generales que en otros países, sino que, en la mayoría de las ocasiones, tiene más que ver con dificultades prácticas de procedimiento.

[...]

Con el fin de facilitar el ajuste de las plantillas, especialmente para las empresas de menor dimensión, se deberá ampliar las posibilidades de despido objetivo, permitiendo que éste pueda afectar a varios trabajadores, dejando de tener el carácter exclusivamente individual de la normativa actual».

El documento abordaba, por tanto, no sólo mayores facilidades del despido objetivo sino también al respecto del despido colectivo, con la vista puesta en una modificación del artículo 52 del ET y del también artículo 56.4 del ET. Todo ello de cara, en esta ocasión, a evitar el continuado fraude empresarial en los pequeños-medianos centros de trabajo, a la hora de los despidos improcedentes colectivos, en relación a la eliminación del 40% de subvención que otorgaba el FOGASA en esos casos concretos¹¹⁸.

A todo lo anterior se sumaría un similar anuncio en las páginas de *El Socialista* en el número 323 —correspondiente a los días 17 al 24 de agosto de 1983— en donde tras anunciar como los sindicatos discrepan de los planes de Trabajo —en concreto los relacionados con la contratación temporal y la bajada del presupuesto de la Seguridad Social— no se excluía tampoco elaborar una ley de huelga —sumada a la LOLS—, lo que también generaría no poco nerviosísimo y confusión. Especialmente cuando se decía como “Almunia adelantó algunas directrices del proyecto en preparación, que, según declaró, estarán terminadas a finales de este año”. Para afirmar a continuación: “La ley de huelga determinará, en última instancia, los funciones de los comités de huelga y las condiciones, en que un colectivo obrero podrá ejercer ese derecho”¹¹⁹.

Lógicamente las reacciones no tardaron en producirse. Por parte del Gobierno, Miguel Muñiz, Secretario General de Economía y Planificación —uno de las mejores cabezas de Economía¹²⁰— desmentía la sola posibilidad de que la cuestión del despido libre ni siquiera se hubiera planteado dentro del Gobierno¹²¹. Aquello era relativamente cierto en términos políticos

¹¹⁸ Noticia, “El ministerio defendió «ampliar las posibilidades de despido objetivo» en la pequeña empresa”, *El País*, 26 de agosto de 1983.

¹¹⁹ “Sindicatos y Ministerio discrepan”, *El Socialista*, n° 323, (1983), pp. 27-28. En aquel mismo número, se incluía el resumen-ejecutivo de un informe de la Dirección General de Empleo, sobre la conflictividad laboral y lo que se considera como las ‘fallidas’ políticas de empleo de la UCD. “Protagonistas: los trabajadores” (pp. 30-32).

¹²⁰ Junto con lo apuntado en el Capítulo 5, *nota 49*, véase la larga entrevista que le haría *El Socialista* durante la segunda semana de septiembre de 1983. El entonces Secretario General de Planificación saldría a defender, punto por punto, el futuro PEMP —que en breve se haría público—. Por destacar un párrafo, nos limitaremos al siguiente: «La principal obligación, pues, de un Gobierno socialista es crear empleo y ser solidario. Para lograrlo hay que conseguir una movilización de los recursos financieros, y desde luego, ampliar las prestaciones sociales al mayor número de parados. La ampliación de la cobertura de paro, es, pues, el primer objetivo de que desde el punto de vista presupuestario se ha planteado el Gobierno». Entrevista, “Miguel Muñiz”, *El Socialista*, n° 326, (1983), pp. 27-30.

¹²¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “La posibilidad de un despido libre en las nuevas empresas origina un fuerte debate entre Gobierno y sindicatos”, *El País*, 25 de agosto de 1983.

pero no en el fondo: si bien, no se había planteado el *despido libre*, lo que se había presentado era una propuesta de flexibilización radical del despido individual y colectivo que no tenía precedentes. Tocaba, pues, lanzado el primer órdago y pre-estructurada una posible agenda de negociación, *enfriar* el ambiente ante la lógica reacción de las fuerzas sindicales.

Una vuelta atrás, en todo caso, que tendría sus costes: UGT no sólo se sentiría nuevamente traicionada –teniendo presente los antecedentes de mayo, de julio...– sino que directamente daría por rotas las posibilidades de llegar a un nuevo Acuerdo Interconfederal antes de cerrar el año, tal y como advirtiera Almunia. Así pues, en una posición extraordinariamente complicada quedarían las *lealtades de familia*. Pero no sólo, pues, de forma gratuita, se ponía en cuestión si tenía sentido –pero también validez– empeñarse en la defensa de las tesis programáticas de su último Congreso Confederal. Lo que parecía evidente es que la voluntad política del Gobierno camina en un sentido contrario a los presupuestos ugetistas¹²². “El Gobierno está actuando en algunos casos con arrogancia y temo que no habrá política de concertación porque algunos miembros del Gabinete prefieren la confrontación social”, declararía entonces Nicolás Redondo¹²³.

La primera fase del proceso de reformas que conduciría a la RET’84 y al AES concluía como solía ser habitual: sin bases de acuerdo, repleto de reproches, medias verdades y amenazas de ruptura e incremento de la conflictividad. Todo ello, mientras que el modelo económico del Gobierno iba tomando una clara tonalidad liberal aliñada con cierta arrogancia y prepotencia. Así el escenario a corto y medio plazo resultaba potencialmente conflictivo una vez conocidas las dimensiones liberalizadoras con respecto al mercado laboral. De hecho, su firme apuesta en materia de mercado de trabajo –ni siquiera imaginable unos pocos meses atrás– le obligaría a modular otras difíciles reformas pendientes, empezando por el aplazamiento temporal de la propia Seguridad Social¹²⁴.

Entre tanto, también en aquellos días finales de agosto también se filtraría los medios la reforma del título II de la restrictiva la Ley Básica de Empleo de 1980, que venía a subsanar y a mejorar claras deficiencias del proyecto nacido tras aprobarse el ET¹²⁵. Todo ello en un claro mensaje dirigido de dar a conocer la *política social* del Gobierno Socialista¹²⁶, pero ante todo tenía un destinatario. Análisis y contra-análisis, propuestas y contrapuestas aparte, se quisiera observar con mayor o menor realismo, el Gobierno había dejado suficientemente claro que no pensaba ceder, en modo alguno, en su política de moderación salarial. Todavía más: la suma de los potenciales costes negativos para el Gobierno –vía radicalización, vía incremento de la

¹²² Noticia, “UGT cree que ya no es posible el concierto social para 1984”, *El País*, 25 de agosto de 1983. Véase igualmente, Noticia, Rodolfo Serrano, “Los sindicatos, contra las propuestas de contratación temporal y a favor de negociar la flexibilidad del mercado de trabajo”, *El País*, 27 de agosto de 1983.

¹²³ Noticia, “Parte del Gobierno prefiere la confrontación social, según Nicolás Redondo”, *El País*, 1 de septiembre de 1983. Meses antes la dirección del PSOE había aventurado la posibilidad de una ‘conflictividad social’ casi inminente. Noticia, Fernando Jáuregui, “El PSOE se muestra consciente de que se avecina una importante conflictividad social”, *El País*, 23 de julio de 1983. De hecho, para inicios del nuevo curso político ya se hablaba en círculos socialistas de un distanciamiento de la UGT con respecto al partido socialista. Noticia, Fernando Jáuregui, “El deterioro de la situación económica y social, preocupación principal del Gobierno y el PSOE ante el nuevo curso político”, *El País*, 2 de septiembre de 1983.

¹²⁴ Noticia, Gustavo Matías, “La reforma de la Seguridad Social, descartada una ley-marco, será paulatina y empezará por los presupuestos de 1984”, *El País*, 29 de agosto de 1983.

¹²⁵ Véase aquí lo apuntado y desarrollado al respecto en el apartado, “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

¹²⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los parados mayores de 55 años recibirán un subsidio con carácter indefinido, según un proyecto de Trabajo”, *El País*, 31 de agosto de 1983; Noticia, “Paros los sindicatos es positivo el subsidio a los mayores de 55 años”, *El País*, 1 de septiembre de 1983.

conflictividad– eran asumibles de no prosperar un AI’84, antes que ceder en los postulados básicos de su política económica¹²⁷.

10.2.2. Sin concertación social pero con «acuerdo» para la reforma del Estatuto de los Trabajadores: *la flexibilización del mercado de trabajo cobra forma y contenido* (septiembre 1983-noviembre 1983)

«Me decían muchas veces: ‘Usted, que ha trabajado como economista en la UGT, ¿Cómo puede decir que no a una propuesta de la UGT?’. Y yo contestaba que la situación era la misma que la del Secretario General de la UGT: él era militante distinguidísimo del Partido Socialista [...] y como era sindicalista, tenía que llevar la contraria al Gobierno en una serie de cosas. Ésas son las responsabilidades que a cada uno le corresponden».

Joaquín ALMUNIA, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (1982-1986)¹²⁸.

En el léxico de los sindicatos *de clase* la expresión un “otoño caliente” figuraba entre las más habituales. No fue así en el otoño del ochenta y tres, aunque razones y argumentos, no faltaran. Desde la alarmante situación de crisis económica, el programa económico de máximos del Gobierno, o, directamente, la continuada precarización del mercado laboral, la aplicación de las 40 horas...

Ante tal tablero de movimientos estratégicos, en las propias páginas de *El Socialista* en el primer número de la semana de septiembre, se interrogarían: “¿Otoño caliente?” Preocupados por el comunicado dado a conocer la semana anterior por la propia UGT, caracterizado por una *inusitada* “dureza”, se trataría de limar las asperezas previendo un posible enconamiento dentro de la familia socialista pero sobre un potencial escenario de conflictividad. Tras deslegitimar la política de movilizaciones de CCOO –con datos y afirmaciones cuestionables como por ejemplo, “no ha hecho otra cosa que mostrarse contrario a toda acción reconversora”– se lanzaba el siguiente órdago:

«En cambio, podría ser peligrosa una acción en contra del propio sindicato socialista, que fue uno de los sectores que con más ahínco apoyó el programa electoral socialista y que ha cumplido el papel de moderador en las relaciones laborales de este país, no solamente con el Partido Socialista sino incluso durante toda la transición.

Una declaración de guerra por parte del primer poder sindical español podría provocar un verdadero otoño caliente que en este momento nadie descarta»¹²⁹.

Justamente, un año después de la celebración de las elecciones del ochenta y dos, el escenario político-social-sindical saliente se había ya establecido, y podía observarse, sin mayores dificultades, una determinada correlación de fuerza. Correlación que se mantendría, a grandes rasgos, hasta octubre de 1987. En este marco, la aceleración de los tiempos políticos en lo relacionado con la reforma integral del mercado de trabajo –la reforma del Estatuto de los Trabajadores, la reforma de la Ley Básica de Empleo y de la futura LOLS– contrastaría con las continuadas vacilaciones y negativas del Gobierno en materia de concertación social. Hasta el punto de que su inflexible posición de partida en materia de negociación salarial, frustrará cualquier posible acuerdo. Lo que sumado a una creciente ya no división sino un enfrentamiento directo entre UGT y CCOO, tendría la virtud, desde la posición gubernamental, de facilitar enormemente la introducción de nuevas *medidas impopulares* y los consiguientes nuevos sacrificios.

¹²⁷ Noticia, “El Gobierno recomendará a la patronal y a los sindicatos una banda salarial para 1984, pero no negociará con ellos”, *El País*, 3 de septiembre de 1983.

¹²⁸ Joaquín Almunia en, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 162.

¹²⁹ “¿Otoño caliente?”, *El Socialista*, n° 325, (1983), pp. 17-19.

Daba, pues, comienzo una segunda etapa de este largo proceso que se puede llevar hasta finales del año 1984, aunque aquí, una vez más, las fronteras cronológicas tampoco puedan establecerse sencillamente. De esta forma, recorreremos los primeros pasos negociadores de la RET'84 –a principios de octubre– hasta su aprobación en un Consejo de Ministros –un 30 de noviembre–. Con el escenario de fondo del PEMP y de los PEG para 1984 y las tremendas dificultades de alcanzar un posible acuerdo de cara a la negociación colectiva del año siguiente; se asistirá en este cuatrimestre a un esquema de negociación cada vez menos público para desarrollarse en ámbitos privados y casi secretos entre la UGT, el Ejecutivo y el propio PSOE. Acuerdos, pactos entre la propia familia socialista, que configurarán un modelo negociador que se reproducirá, con posterioridad, en el Acuerdo Económico y Social a un escala todavía mayor. O si se prefiere, más profesionalizada.

Enfriado el ambiente político-sindical tras las propuestas filtradas desde agentes gubernamentales favorables al *despido libre*, a lo largo del mes de septiembre se retomaría el siempre débil marco de negociación en relación al nuevo *pack legislativo* laboral. Perfilado el PEMP se darían, entonces, a conocer las orientaciones en materia salarial por parte del Gobierno: un 6,5% para el sector público como referencia también para el sector privado, cuando se estimaba una inflación del 8% para 1984¹³⁰. Traducidos en términos prácticos: aquello ya era un aviso sino toda una declaración política de que el denominado sacrificio salarial, es decir, la pérdida de poder adquisitivo, constituía uno de los argumentos centrales de la estrategia de modernización socialista. Una historia que parecía no tener fin, desde los Pactos de la Moncloa. A la par que se manejaban estas cifras, los sindicatos y la patronal estaban a la espera de recibir cualquier tipo de documento así como un posible calendario para negociar¹³¹. Un calendario que se iba estrechando, pues como había anunciado el Gobierno meses atrás su intención era presentar los Presupuestos Generales en aquel mismo mes de septiembre.

En este mismo escenario de provisionalidad, mientras que CCOO anunciaba su propio calendario de movilizaciones sin concretar aún; por parte de UGT, tras los agitados meses de julio y de agosto y sus sendas reacciones airadas, no dejaría de defender, en adelante, la tesis de que iría a la negociación a defender el “poder adquisitivo global”. Lo cierto es que por este lado la historia también se repetía: UGT –el mismo sindicato al que le gustaba auto-presentarse como un agente social *responsable*– a cada una de sus reacciones exaltadas o inclusive excesivamente duras o destempladas, a los pocos días volvía a anunciar su innato espíritu negociador¹³².

Eso sí, el *enfado* y las desconfianzas ugetistas eran cada vez más palpables. Después de los desmentidos oportunos del Gobierno y Economía de agosto, vendría el del PSOE en septiembre. En concreto, por parte de la Ejecutiva reunida el viernes 2 de septiembre. No se ocultaría públicamente ni antes ni después –aunque, en realidad, todo formara parte de una estrategia mediática bien definida como tiempo tendremos de examinar– la preocupación de la CEF del PSOE tanto por la crisis económica como por el “distanciamiento” con UGT¹³³.

Prueba de lo que se jugaba el Ejecutivo, y de la necesidad de que la UGT no se desmarcara de la estrategia gubernamental en aquellos precisos instantes, sería su insistencia de que no se propondría, en ningún caso y de ninguna manera, el *despido libre*. Todo ello en boca de Manuel Chaves –uno de los políticos mejor y más informados ante su asombrosa dualidad en las Ejecutiva del PSOE y de la UGT al mismo tiempo– quien no negaría, en cualquier caso, los planes flexibilizadores. Pese a esta llamada a la concordia y al diálogo, Redondo no asistiría

¹³⁰ Finalmente la inflación resultante para 1984 sería de 10,6%, dos puntos y medio por encima de la previsión del Gobierno.

¹³¹ Noticia, “El Gobierno fijará un tope salarial del 6,5% en el sector público y aconsejará subidas semejantes en el privado”, *El País*, 8 de septiembre de 1983.

¹³² Noticia, “UGT se reafirma en defensa del poder adquisitivo”, *El País*, 7 de septiembre de 1983.

¹³³ Noticia, Fernando Jáuregui, “El deterioro de la situación económica y social, preocupación principal del Gobierno y el PSOE ante el nuevo curso político”, *El País*, 2 de septiembre de 1983.

a la reunión de la CEF¹³⁴. Y como hemos insistido, en más de una y de dos ocasiones, los *gestos* en política son tantos o más importantes que los contenidos. Chaves, en un vano intento de quitar *hierro al asunto*, declararía –según recogería *El Socialista*– tras perjurar que el “Gobierno no piensa modificar el Estatuto de los Trabajadores”, lo siguiente:

«Tenemos que acostumbrarnos al hecho de que las centrales sindicales puedan mostrar discrepancias respecto a las medidas del Gobierno. Pero esto, por supuesto, no es ninguna razón para entender que algunas de las últimas declaraciones hayan supuesto una quiebra del apoyo del sindicato socialista al Gobierno que preside Felipe González»¹³⁵.

Por su parte, en la primera reunión de la CEC de UGT después del mes de agosto, se pasaría revista a un largo temario. En una reunión que duraría dos largos como intensos días –el martes 7 y el miércoles 8 de septiembre– se optaría por fijar las posiciones con respecto a cada una de las cuestiones pendientes de debate y negociación, lo que conllevaría, asimismo, la elaboración de un largo documento dado a conocer a los medios. Pero de puertas para adentro, la decisión más importante sería la de seguir manteniendo “contactos internos con la Administración encaminados a perfilar todo lo concerniente al Plan Económico y los Presupuestos para el año 84”. O dicho de otra forma, se optaba por la vía tantas veces ensayada, de continuar con un *diálogo bilateral* –no público, por extensión– para llegar al principio de las negociaciones con un “acuerdo por arriba” y en secreto¹³⁶.

Pese a dejarse por escrito que se adjuntaría el documento elaborado correspondiente en el *acta*, éste no se ha podido ser localizado. Así pues, por lo que se pudo conocer en la prensa durante aquellos dos días, UGT no renunciaría a seguir defendiendo el mantenimiento del poder adquisitivo, dentro de su anunciada política de solidaridad y responsabilidad. Y dejando bien claro que se oponía a una mayor ampliación de la flexibilidad laboral. Ello con crítica incluida al *Libro Blanco* sobre la reconversión industrial y a la *Instrucción* de julio de Trabajo con respecto a la aplicación de las 40 horas¹³⁷.

También se demostraría en la citada ocasión como la *línea directa* entre San Bernardo y La Moncloa seguía funcionando bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que el miércoles 7 la reunión de la CEC de la UGT concluía a las 14.00h, y que para el día siguiente, jueves, ya habían concretado una cita con el Presidente del Gobierno. De cualquiera de las formas, al menos, aquel encuentro se haría público, cuando no pasaba un día en que se conociera por la prensa otras tantas “reuniones secretas” entre la UGT y el Gobierno, tal y como se criticaba desde el sindicato comunista¹³⁸.

Convocada y celebrada la reunión en La Moncloa, González estaría escoltado por Almunia y Guerra, mientras que Redondo por Corcuera, Zufiaur y Chaves. Preocupada por el cariz que estaban tomando los últimos acontecimientos, desde la UGT se solicitaría “agotar todas las posibilidades de concertación social y la urgencia de volver a convocar a las partes sociales”. Asimismo le haría llegar su intención de negociar no pocas partidas de los futuros

¹³⁴ Noticia, Fernando Jáuregui, “La comisión ejecutiva del PSOE niega categóricamente que el Gobierno pretenda establecer el despido libre”, *El País*, 3 de septiembre de 1983.

¹³⁵ “Moderación salarial y contención del gasto”, *El Socialista*, nº 326, (1983), pp. 8-9.

¹³⁶ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 6. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 6 de septiembre de 1983”, sig. 002251-003.

¹³⁷ Noticia, “UGT se reafirma en la defensa del poder adquisitivo”, *El País*, 7 de septiembre de 1983.

¹³⁸ Noticia, Víctor Gijón, “El Ministro de Trabajo afirma que no se negociarían los Presupuestos”, *El País*, 10 de septiembre de 1983.

PGE¹³⁹. Por el momento, ningún acuerdo saldría de las citadas reuniones, tanto públicas como secretas¹⁴⁰.

Desde la consabida habilidad de los socialistas en manejar los tiempos políticos como los medios de comunicación, los posibles márgenes de una posible negociación en torno a los propios PGE –incluido aquí el PEMP al que estaba profundamente ligado– en relación a aspectos sociales se iban estrechando. Tampoco quedaba muy claro a esas alturas si el futuro PEMP era negociable o no. Así lo declaraba el propio Ministro de Trabajo cuando señalaba también en la UIPM en un seminario sobre *Reforma de la Seguridad Social y servicios sociales*, que “no hay que confundir la negociación con sindicatos y empresarios del plan económico del Gobierno con una negociación de los Presupuestos”¹⁴¹. A lo que vendría a añadirse una seña característica de los próximos meses: las frecuentes declaraciones, en forma de campaña publicitaria, destinada a predisponer, a *manipular* en suma, a la opinión pública en torno a la futura reforma laboral: “Cuando hemos expuesto nuestras ideas en torno a ese tema a los sindicatos [...] no se ha producido rechazo y creo y espero que comprendan la necesidad de que se establezca una cierta flexibilidad en la contratación”¹⁴².

El lunes 12 de septiembre, a escasos días de aprobarse los PGE –que se aprobarían, finalmente, en Consejo de Ministros el miércoles 15– y, por tanto, sin margen de negociación real posible, el Gobierno iniciaba una segunda ronda de contactos con los agentes sociales a lo largo de dos jornadas, sin mucho ánimo ni voluntad negociadora de por medio, y arrancada, a la postre, por las presiones de la propia UGT. Las tantas veces mencionadas previsiones gubernamentales contenidas en los dos escenarios de futuro que preveía el PEMP, por fin se entregarían por escrito¹⁴³. Eso sí, sintetizadas en un escueto documento de trabajo¹⁴⁴. No faltarían en tal evento las promesas y previsiones –con una enorme exactitud como no dejaría de ser norma en aquel tiempo– y que como anunciaríamos fallarían estrepitosamente sobre todo el campo de los empleos prometidos –680.000 empleos nuevos se estimaban posibles para el final de la legislatura dentro del escenario más optimista–¹⁴⁵. Abierta la puerta de la

¹³⁹ Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de *Presupuestos Generales del Estado para 1984*. Véase también lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 73*.

¹⁴⁰ “UGT pide al presidente del Gobierno que se agoten todas las vías para lograr una política de concertación Social”, *El País*, 9 de septiembre de 1983.

¹⁴¹ En otra crónica de *El País* fechada un 11 de septiembre se llegaba a afirmar como frente a la insistencia de UGT, «[e]sta pretensión se contrapone a la postura del Ejecutivo, que no quiere ver hipotecado el diseño de su actuación para el próximo año, máxime cuando está condicionado por la necesidad de contener el déficit público y la falta de recursos para ampliar los gastos asistenciales en la medida de las exigencias sindicales». Noticia, Rodolfo Serrano y Félix Monteiro, “La negociación colectiva de 1984, condicionada por el papel de los sindicatos en el programa económico del Gobierno”, *El País*, 11 de septiembre de 1983.

¹⁴² Noticia, Víctor Gijón, “El Ministro de Trabajo afirma que no se negociarán los Presupuestos”, *El País*, 10 de septiembre de 1983. De muy diferente opinión era Marcelino Camacho por aquel tiempo. Así denunciaba una campaña de acoso y derribo destinada a «debilitar las posiciones de los trabajadores y de sus sindicatos y así justificar una política de carácter monetarista». Añadiendo, «es conveniente situar toda esa campaña que se ha hecho sobre la necesidad que los sindicatos avalen la contratación temporal generalizada, el despido más fácil y más barato, la reducción de los salarios, la renuncia incluso al propio programa del PSOE, lo que en su conjunto constituye una política antisocial y antisindical». Concluyendo: «CCOO no se endurece. El Gobierno se ablanda ante los poderes fácticos nacionales e internacionales: CCOO sigue siendo un sindicato de clase, democrático e independiente». CAMACHO, Marcelino, “Comisiones Obreras no se endurece; se ablanda el Gobierno”, *El País*, 12 de octubre 1983.

¹⁴³ Véase lo apuntado en la *nota 79*.

¹⁴⁴ Véase lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 189*.

¹⁴⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno propone incrementos salariales inferiores a la inflación durante el trienio 1984-1986”, *El País*, 13 de septiembre de 1983. Véase igualmente, Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno logrará situar la cifra de parados por debajo de los dos millones si se cumple el

negociación, abierta quedarían la puerta a posibles modificaciones del PEMP y de los propios PGE. Aunque como en otras tantas ocasiones aquello formaría, a la hora de la verdad, parte de la retórica discursiva gubernamental antes que una invitación real a negociar¹⁴⁶.

La citada reunión entre Gobierno y el sindicato socialista, que duraría más de seis horas supondría un duro y nuevo varapalo para la UGT. ¿Por qué? Primero, por las previsiones en materia de crecimiento salarial: un 6,5% previendo una inflación del 8% para 1984. Pero no terminaban ahí los sacrificios salariales ya que 1985 y 1986 se mantendrían aunque más atenuados. De cumplirse ése y otros requisitos se incrementaría la productividad así como se darían las condiciones óptimas –siempre y cuando hubiera acuerdo de por medio o al menos no se superará en el marco de negociación colectiva las cifras citadas– para la creación de empleo antes estimada –que en tan sólo un día pasaría de 640.000 a 680.000, debido, según Boyer, un error de los periodistas al transmitir al unisonó tal información–. En rueda de prensa, el propio señor Ministro de Economía no tendría pudor en afirmar lo siguiente en relación a cómo los trabajadores mantendrían su poder adquisitivo, a través de una explicación no apta para no iniciados en los saberes económicos y en las profundidades de la *dialéctica socialista*:

«El Gobierno, según argumentó al termino de la reunión Miguel Boyer, estima que en su conjunto las rentas salariales, como consecuencia de esa creación de empleo, habrían aumentando más de un punto por encima de la inflación, con lo que, a su juicio, se cumple el objetivo de mantener el poder adquisitivo global de los salarios»¹⁴⁷.

El segundo punto de choque –previsible en todo caso– estaría en relación a las propuestas relativas a ampliar la contratación temporal. Negada por *activa* o *pasiva* por Boyer y Almunia la sola posibilidad de ir hacia el despido libre, la UGT mostraría su total rechazo. Sin darse a conocer todavía el contenido integro de la futura RET'84, no obstante, comenzaban a adivinarse las intenciones por parte del Ministerio de Trabajo: la eliminación del “carácter de excepcionalidad a la contratación temporal” que, según Almunia, “restaban posibilidades a la figura del contrato temporal”. Por más que se dijera que se mantendrían todas las cautelas para evitar una posible sustitución de trabajadores fijos por temporales, el panorama no era alentador. Y, precisamente, en torno a esta misma cuestión, se concentrarían los principales escollos para un futuro acuerdo. No era para menos: el ataque al concepto de causalidad de la contratación temporal aparecía en primera línea¹⁴⁸.

Los dignatarios de UGT *bautizados* en “necesarios creyentes” de la política económica socialista tras la salida de su 33º Congreso, asumirían de las mejor de las formas este nuevo *varapalo*. El tercero, al menos, en menos de medio año. La *resignación ugetista* se ponía a prueba. Al día siguiente, martes 13 de septiembre, se reuniría la CEC de UGT, con la idea todavía presente de que el PEMP se podía negociar, e inclusive se podrían también negociar los PGE, cuando en realidad, y como denunciaría CCOO, aquellos dos días de negociaciones, más

programa económico”, *El País*, 15 de septiembre de 1983. Igualmente en el campo laboral y de la protección por desempleo tampoco faltarían las continuadas promesas a lo largo de estos meses: Noticia, Rodolfo Serrano, “El 45% de los desempleados percibirá prestaciones al finalizar 1986”, *El País*, 17 de septiembre de 1983.

¹⁴⁶ Como afirmaría el propio Miguel Boyer a la salida de la reunión con la UGT: «No sólo estamos en una actitud favorable, es que la Constitución ordena que un plan económica se negocie con las fuerzas sociales». Noticia, “Salarios y contratos temporales, puntos conflictivos”, *El País*, 13 de septiembre de 2009.

¹⁴⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno propone incrementos salariales inferiores a la inflación durante el trienio 1986-1986”, *El País*, 13 de septiembre de 1983.

¹⁴⁸ «Joaquín Almunia, que reconoció que el tema había sido discutido y que UGT había insistido en mantener su carácter coyuntural, indicó que no había inconveniente en remitir a los sindicatos los planes del Gobierno en este sentido, y que fuera incorporado como una parte más de la negociación de todo el programa». Noticia, “Salarios y contratos temporales, puntos conflictivos”, *El País*, 13 de septiembre de 2009.

bien, tendrían, a la postre, un carácter informativo. Con todo, para la centran socialista se saldría con una especie de *sensación colectiva* de que aquel encuentro había resultado positivo.

Por un lado, se destacaría como en los PGE para 1984, “se contempla un cualitativo avance social, fundamentalmente, en lo que hace referencia a los fondos destinados al Desempleo, la revaloración de las Pensiones, Fondo Comunitario, etc.”. Lo que ya ofrecía más dudas –serías y constatadas dudas, añadiríamos– era en materia de negociación salarial. El *frio* anuncio de Boyer obligaba a la Ejecutiva ugetista a readaptar y ajustar las tesis congresuales esbozadas en su ponencia de Acción Sindical, al respecto del salario *nominal* y *salarial*. Sin cuestionar ni debatir y menos refutar las previsiones gubernamentales, y previendo una negociación dura, no se descartaría la posibilidad de ir un pacto a tres años, precisamente, el tiempo para finalizar la legislatura. Un hecho este último que la prensa pasaría por alto. Desde la Ejecutiva, por tanto, no se rechazaría ese “marco de negociación concertada a tres años, donde entre otras materias se contemple todo lo relacionado con los salarios, así como lo concerniente a las medidas institucionales, Ley de Acción Sindical, Patrimonio Histórico, modalidades de contratación, etc.”. La central socialista, por tanto y una vez más, se mostraba abierta y suficientemente convencida de las posibilidades de concertación, a la vista de lo expresado por el Ejecutivo con quien no se había negociado absolutamente nada en la práctica¹⁴⁹.

Mientras todo esto sucedía, aquel mismo martes el Ejecutivo volvería a presentar a la CEOE y a CCOO las mismas propuestas y documentos. Por parte empresarial, se evidenciarían críticas menores –en relación a lo que consideraban una muy limitada reducción del gasto público y una también una limitada moderación social, según la patronal– pero sin negar el apoyo político correspondiente. O si se prefiere, sin generar mayores oposiciones¹⁵⁰. Asimismo se cerraría aquella efímera ronda de negociaciones con CCOO, quien se mostraría, plenamente, contraria a los planes económicos del Ejecutivo. Todo ello sumada a una fuerte convicción que se mostraría cierta: el Gobierno no quería ningún tipo de concertación una vez cerradas las vías reales para negociar los Presupuestos Generales. Todavía más, pues, pese al intento de *venta* de las bondades de Almunia con respecto al incremento en los PGE de las cantidades destinadas a la cobertura por desempleo –50.000 millones en concreto¹⁵¹– Comisiones Obreras tendría menos dificultades –así como menos *anteojeras políticas*– en observar más fielmente lo que allí había sucedido: presentación de la política económica del Ejecutivo, sin margen de negociar tanto el PEMP como los PGE. Conclusión: en esa coyuntura parecía, del todo, complicado inclusive hablar de pacto social.

Así pues, tras dos días de reuniones con los agentes sociales a la par que quedaba perfilada la posición de cada una de las partes, poco o nada se había avanzado. Eso sí, al menos se había cumplido con el trámite necesario en tales casos. “Fase de tanteo”, llegaría a titular *El Socialista* la noticia de la presentación del “plan económico”. Junto con un *alentador* cuadro macroeconómico elaborado para la ocasión, se volvería a hablar ahora de que se modificaría el ET, pese a lo dicho y prometido en la reunión de la CEF del día 2 de septiembre. Con una enorme sinceridad, se destacaría asimismo, como con la propuesta del Ejecutivo “se ofrece a los empresarios una serie de condiciones favorables para crear empleo y se combaten las rigideces que en materia de contratación pueda existir”. Para concluir, previa advertencia de que *CCOO dice no a la moderación*: “el objetivo del Gobierno es combatir el desempleo por

¹⁴⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 7. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 13 de septiembre de 1983”, sig. 002251-003.

¹⁵⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE reafirma su pesimismo sobre la creación de 800.000 puestos de trabajo con el programa económico del Gobierno”, *El País*, 14 de septiembre de 1983; Noticia, “CCOO, decepcionada tras la reunión para la concertación social”, *El País*, 14 de septiembre de 1983.

¹⁵¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El 45% de los desempleados percibirá prestaciones al finalizar 1986”, *El País*, 17 de septiembre de 1983.

todos los medios, a través de una política económica que pueda ser ampliamente respalda por las fuerzas sociales”¹⁵².

Arrancado el citado ciclo de reuniones, en parte debido a las presiones de la UGT como se ha dejado apuntado, CCOO poco se jugaba a nivel político y de imagen una vez conocida, con papeles y datos, la propuesta socialista de una *brutal* política de pérdida de poder adquisitivo, así como los iniciales planes en materia de contratación temporal. Además si fuerte era su convicción de que el Gobierno no estaba por la labor de llegar acuerdos, también fuerte era su convicción de las muy escasas posibilidades reales de que mediante la negociación se pudieran frenar o atenuar los principales aspectos en juego. La confirmación de sus tesis vendría de la mano del Consejo de Ministros del miércoles de esa misma semana, en donde se aprobaría los PGE de 1984. Probablemente –y como se destacado en su momento¹⁵³– los más duros y restrictivos de toda la época socialista.

Junto a las numerosas críticas que recibirían los propios PGE –de derecha a izquierda y de izquierda a derecha– incluida alguna que otra llamada a la desobediencia civil por parte de los *sectores ultras* de la patronal¹⁵⁴; el marco político-económico en donde llegaban los mismos era tremendamente complicado. En el plano político, el *ruido de sables* continuaba con no pocas como sorprendentes destituciones de altos mandos militares, a lo que pronto se sumaría la *batalla* de la LODE, mientras que el conflicto de Sagunto alcanzaba uno de sus mayores puntos de intensidad¹⁵⁵. Asimismo tendría lugar el primer Debate del Estado de la Nación, en donde por más que el presidente González volviera a lanzar su consabido mensaje de *optimismo* y *esperanza*¹⁵⁶, no dudaría en defender su política económica sin mayores autocríticas ni mayores sensibilidades, incluida la política laboral¹⁵⁷.

Certificada la “innata” *voluntad negociadora* del Ejecutivo tras la presentación de los PGE en el Consejo de los Ministros el miércoles 15 y el viernes 23 en el Congreso; cada uno de los interlocutores reacomodaría su estrategia temporal de actuación. Por parte de la CEOE, que tampoco nada o poco se jugaba en aquel contexto, continuaría con su política. De hecho, y asumidas de entrada, sin debate ni negociación de por medio, muchas de sus reivindicaciones –

¹⁵² DIEZ, Luis, “Fase de tanteo”, *El Socialista*, n° 328, (1983), pp. 14-17. En concreto sobre la posible modificación del ET se diría textualmente: «Se trata en palabras de Joaquín Almunia, de regular en la ley los contratos temporales de forma que no queden al albur de las normativas que el Gobierno emita en cada momento. Joaquín Almunia afirma que en ningún caso la flexibilidad se refiere a las plantillas fijas de las empresas, sino a las nuevas contrataciones que por esta vía realizarán los empresarios. La reforma del Estatuto de los Trabajadores pretende asimismo que no se sigan sustituyendo puestos de trabajo fijos por contratos temporales, como ahora ocurre» (p. 15).

¹⁵³ Nos remitimos a lo apuntado en la *nota 139*.

¹⁵⁴ Noticia, Gonzalo Rodríguez, “Aumentar los impuestos puede provocar la desobediencia civil, según Segurado”, *El País*, 25 de septiembre de 1983.

¹⁵⁵ Véase lo apuntado al respecto en, “11.2. El último episodio de la «lucha de clases» en España: el I Trimestre largo de 1984”.

¹⁵⁶ CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE, *Debate sobre la comunicación del Gobierno formulada a los efectos de lo establecido en los artículos 196 y 196 del Reglamento*, II Legislatura, n° 55, 20 de septiembre de 1983 (número de expediente 200/000001), pp. 2625-2639.

¹⁵⁷ Véanse aquí las crónicas del momento en: Noticia, Julián García Candau, “Frente al optimismo de Felipe González, Fraga anunció la catástrofe”, *El País*, 21 de septiembre de 1983; Noticia, “Los nacionalistas y Santiago Carrillo criticaron duramente al Gobierno por su política autonómica y social”, *El País*, 22 de septiembre de 1983; Y asimismo los dos editoriales que dedicaría el medio en cuestión: Editorial, “El tedio de un debate”, *El País*, 21 de septiembre de 1983; y, Editorial, “Después del tedio”, *El País*, 23 de septiembre de 1983. Con un enfoque mucho más amable se enfocaría el primer ‘Debate del Estado de la Nación’ en, GUIJARRO, Luis, “Reflexiones para después de un debate”, *El Socialista*, n° 329, (1983), pp. 8-9. Sobre la necesidad del mismo y su contenido pedagógico léase también, Editorial, “El Gobierno informa”, *El Socialista*, n° 328, (1983), p. 7.

e inclusive históricas– su campo de actuación se había visto ampliado notablemente, al ir conociendo los detalles de un programa económico que casaba en buena parte con el suyo. Como acordaría su Comité Ejecutivo, por tanto, tocaba promover y defender un posible programa de máximos, que pasaba por la reducción de los costes laborales y el gasto público¹⁵⁸.

Más complicada sería la posición de CCOO. No tanto con respecto a la estrategia a mantener frente al Ejecutivo, sino en torno a cómo y de qué forma afrontar la posible fase de concertación que se abriera. Una estrategia que, en todo caso, conllevaría no pocos debates en su seno como rápidamente se encargaría la prensa de resaltar. Después de la reunión de su Comisión Ejecutiva celebrada el día 13¹⁵⁹, se convocaría el CS el martes 20 de septiembre. En la misma, Camacho en la presentación de su *informe de gestión* ahorraría críticas contra el Gobierno o “una determinada parte” del mismo. Una gran idea lo impregnada todo: difícil se veía cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo en las futuras mesas de concertación que se abrieran.

No sólo por la tardanza con que se habían producido la comunicación informativa del Ejecutivo, sino por la sencilla razón de su contenido. Con especial gravedad se vería la propuesta de incremento salarial del 6,5%, cuando se estimaba, al menos, que el IPC sería del 9% al 10%. Asimismo el propio Camacho advertiría como “CCOO no busca la confrontación”, a la par que no negaba la posibilidad de sentarse a negociar. Asimismo de aquel CS saldría la aprobación de llevar adelante toda una serie de movilizaciones con respecto al cumplimiento de las 40 horas, que más pronto que tarde serían recriminadas y fuertemente contestadas por el entorno socialista¹⁶⁰.

En este clima de constantes reposicionamientos, una vez más, desde *El País* de la mano de Rodolfo Serrano, saldrían a relucir las supuestas *divergencias* internas dentro de CCOO sobre las anteriores cuestiones citadas. No era la primera vez que esto sucedía. Tampoco sería la última. En una noticia publicada el 21 de septiembre se incidiría en los diferentes criterios que desde “determinados sectores de CCOO”, se tenían con respecto a la intervención de Camacho que acabamos de examinar. Sectores –identificados, al menos en esta ocasión, con aquellos que “propugnan una clara independencia del sindicato con respecto al PCE”, y que por tanto se podría interpretar como próximos a la minoritaria Corriente Socialista Autogestionaria de CCOO– mostrarían su *sorpresa y disgusto* por el tono “excesivamente radical” mostrado por el Secretario General y que, a su juicio, imposibilitan o entorpecían un posible pacto social. El guión expuesto –y que se retomaría siempre y cuando se considerara necesario desde las páginas de *El País*– advertiría de los posibles y potenciales riesgos de un nuevo aislamiento de las propias Comisiones en caso de no negociar recordando la experiencia del AMI. Con todo, se evitaría hablar en la citada crónica de divisiones o tensiones internas como era habitual.

De este modo, la UGT por sí misma adquiriría un protagonismo inesperado. No sólo se jugaban las buenas relaciones de familia con la socialista, a fuerza de llevar a cabo en dicho contexto su defendido *giro programático*; sino es que con las condiciones de partida expuestas por los socialistas –entre otras, aceptar la dura política de moderación salarial y la flexibilización del mercado de trabajo– podía implicar un fuerte desgaste político y a nivel interno. Aislada en aquel escenario, a lo máximo que podía aspirar era a reducir posibles costes organizativos a la par que atenuar las dimensiones de las reformas estructurales previstas. Un papel que mal se atenía a quien estaba dispuesto a hegemonizar, sin titubeos ni sentimentalismos, el campo sindical desde una perspectiva socialdemócrata.

¹⁵⁸ Noticia, “La CEOE plantea la reducción de los costes laborales y del gasto público”, *El País*, 21 de septiembre de 1983.

¹⁵⁹ AHT, CCOO-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal del día 13-IX-1983”, sig. 001-00035.

¹⁶⁰ AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión del Consejo Confederal del día 20-IX-1983”, sig. 2-08. Y asimismo, Rodolfo Serrano, “Marcelino Camacho reafirma sus deseos de concertación, pero no en los términos planteados por el Gobierno”, *El País*, 21 de septiembre de 1983.

En esta tesitura –a lo largo de las últimas semanas de septiembre– no tardaría en llegar la reelaboración de la rápida caduca estrategia ugetista planteada en julio. Daba inicio así al primero de los *giros estratégicos* que caracterizarían la forma de hacer y entender el sindicalismo *moderado y responsable* ugetista en las siguientes semanas. Una vez, expuestas las intenciones y planes gubernamentales, no cabía marcha atrás. Así el 17 de septiembre, se conocía por la prensa como “UGT defenderá la negociación con el Gobierno del programa económico a medio plazo, intentando implantar un nuevo modelo sindical en el que las reivindicaciones salariales pierdan la importancia que han tenido hasta ahora”. Asunción o no de la *realidad imperante*, aquello suponía un paso de calado. No sólo, pues, de las declaraciones se pasaría a los hechos consumados, mediante la publicación de un documento en que se venían a comparar las ventajas comparativas de aquel proceso negociador con las finalmente obtenidas en el ANE¹⁶¹. Un documento un tanto sorprendente por el momento de su publicación como por su lectura a-histórica de dos procesos radicalmente diferentes entre sí, y que según se pudo conocer tenía por objetivo “contrarrestar las resistencia que viene presentado CCOO” al PEMP. De esta forma, desde UGT, se defendería como se trataba de ir hacia un *nuevo modelo sindical* en consonancia con sus tesis congresuales¹⁶².

De puertas para adentro la lectura sobre el muy supuesto incremento de las partidas sociales de los PGE, se interpretaría como una aceptación de los “planteamiento mantenidos por la UGT y por tanto se hace una valoración positiva”. Las anteriores palabras entrecomilladas se refieren a la transcripción literal del acta de la CEC de UGT del 19 de septiembre. Y pese a todas las evidencias acumuladas con respecto a la cuestión salarial, y que en tan difícil posición colocaban a la UGT, no se renunciaba tanto a negociar la política salarial para el sector público –pese a que se había dejado sobrada constancia de que no se iba a *tocar* la cifra del 6,5%– así como se evidenciaba la “disposición de la UGT a negociar las rentas salariales dentro de un marco general, aceptando como techo la inflación prevista para el año próximo”. O dicho con otras palabras, dando por válidas las previsiones gubernamentales, la central socialista negociaría, de entrada, una banda salarial entre el 6,5% al 8%. Y finalmente con respecto al PEMP, se solicitaría una “reunión tripartita [...] tendente a configurar el marco de negociación”. Todo ello cuando también el mismísimo Boyer había dejado sentado que no se estaba por la labor de negociar el mismo¹⁶³. La *resignación ugetista* pero también la confianza de influir, a través de los canales familiares, se mantenía, en gran medida, intacta todavía.

Renacida la esperanza, reforzada la *fe ugetista*, hasta el final de aquel mismo de septiembre no faltarían las muestras de indudable apoyo al Gobierno, a su “única política posible”, acompañada de las habituales dosis de populismo. Así, por ejemplo, “Redondo afirmó que las críticas más rigurosas al gabinete de Felipe González provienen del sindicato socialista”, horas después de la última reunión de la CEC de UGT¹⁶⁴.

Por más que no se pudiera evitar algunas salidas de tono como la de los *compañeros* de UGT de Granada¹⁶⁵, la central socialista se mostraría perseverante en su empeño en abrir un marco de negociación. Casi, a cualquier precio se podría añadir. Igualmente, el mismo día de la última Ejecutiva de UGT, se enviaría una carta al Presidente del Gobierno solicitándole una

¹⁶¹ El mismo puede consultarse en, *Unión*, nº 44 (0) (1983), correspondiente a la segunda quince de diciembre

¹⁶² Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT defenderá negociaciones diferenciadas con el Gobierno y organizaciones empresariales en la concertación social”, *El País*, 17 de septiembre de 1983.

¹⁶³ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 8. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 18 de septiembre de 1983”, sig. 002251-003.

¹⁶⁴ Noticia, “Nicolás Redondo solicita a los ugetistas apoyo para el Gobierno”, *El País*, 19 de septiembre de 1983.

¹⁶⁵ Noticia, Eduardo Castro, “Duras críticas de los ugetistas de Granada a la política laboral del Gobierno”, *El País*, 20 de septiembre de 1983.

reunión a tres bandas para hablar del PEMP tal y como acabamos de observar. Había llegado, entonces y casi sin preaviso, la hora de evidenciar como se había encontrado la “formula” compatible entre su *nuevo modelo sindical* y los posibles campos de negociación del PEM.

Todavía más, pues, desde la prensa se interpretaría aquella misiva –filtrada desde la propia UGT– como una maniobra de cara a obligar a Comisiones Obreras a reconsiderar su posición, y sumarse a la negociación. Pero, ante todo, estaba destinada a mostrar unas *pretendidas* contradicciones políticas dentro del sindicato comunista, por haber convocado una serie de movilizaciones de la mano del PCE –por más que se obviará intencionadamente que las mismas nada tenían que ver los PGE o el PEMP, en tanto se hallaban las mimas vinculadas al cumplimiento de la ley de las 40– y, a su vez, pretender sentarse a una misma mesa de negociación. Lo que no explicaba la citada carta, es que con la misma también pretendía romper su más que evidente aislamiento como su manifiesta debilidad frente al Ejecutivo¹⁶⁶.

Ahora bien, mal casaban aquellos movimientos con lo que se acordaba y se negociaba internamente. En este sentido, resulta altamente clarificador leer con atención el acta de la reunión de la CEC de UGT el 27 de septiembre. Allí, de nuevo, la Ejecutiva ugetista no sólo volvería a evidenciar su disgusto por lo acontecido durante el Debate del Estado de la Nación, ante la “actuación del Grupo Parlamentario Socialista, concretamente a su portavoz”, en tanto el mismo terminaría por asumir “algunas propuestas parlamentarias de otros grupos, fundamentalmente la que hizo referencia a la necesidad de elaborar un Proyecto de Ley que contemple una mayor flexibilización en los contratos de trabajo”. En concreto, se refería a las propuestas del Grupo de la Minoría Catalana.

No obstante, y dado por cerrado definitivamente el capítulo de los PGE, y en menor medida del PEMP, la organización comenzaría a preparar la negociación colectiva para 1984. Y, nuevamente, se volvía a poner en práctica la *vieja* estrategia: “A tal efecto se cree conveniente el mantener alguna reunión bilateral con el Gobierno, de cara a despejar dudas existentes y que posibiliten un acercamiento previo a la propia Negociación”. Por si faltaban pruebas de la *sinceridad* de UGT con respecto a posibles acuerdos con CCOO frente a los diferentes escenarios negociadores, ni siquiera se la tenía presente en cuenta de cara a las reuniones previas para la negociación colectiva de 1984. Eso sí, se afirmaba como “se considera oportuno mantener una reunión con la CEOE” para tales cuestiones. Igualmente, se establecería en la citada reunión un *calendario legislativo* en relación a “los distintos borradores o proyectos existentes en caminos a configurar el paquete de Leyes Legislativas”, con el fin de marcar la posición de UGT. Y nos preguntamos, ¿entre esos “distintos borradores o proyectos existentes” ya estaba en manos el *pack legislativo* de la reforma del mercado de trabajo?¹⁶⁷ No es baladí, la anterior cuestión por la forma en que se negociaría la RET’84. Fuera como fuese, hay aquí un primer indicio altamente relevante que más tarde nos ayudará a confirmar una hipótesis de trabajo fundamental.

Lo cierto es que si nos movemos por lo que hasta ahora se ha podido extraer de las fuentes consultadas, a menos de poco más de dos meses del cierre de la reforma del mercado de trabajo, desde el Gabinete Técnico del Ministerio de Trabajo todavía no se había concluido, y

¹⁶⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “Nicolás Redondo pide al presidente del Gobierno que intente fijar con patronal y sindicatos los límites para la negociación colectiva”, *El País*, 20 de septiembre de 1983. En aquellos mismos días también se conocía en los medios la propuesta del Ministro de Trabajo, acerca de rebajar 1,5 puntos la cotización a la Seguridad Social por parte de los empresarios en su política de reducción de los costes empresariales. Una política que mal casaba ya no sólo con un planteamiento socialista, sino con las continuadas presiones para reducir el gasto público. Noticia, Rodolfo Serrano, “La reducción de 1,5 puntos en la cotización a la Seguridad Social beneficiaría únicamente a las empresas”, *El País*, 1 de octubre de 1983.

¹⁶⁷ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 9. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 27 de septiembre de 1983”, sig. 002251-003.

por tanto entregado, el *proyecto* de reforma del mercado de trabajo¹⁶⁸. De esta forma, las más cercanas referencias por escrito se encontraban planteadas en el PEMP y sin mayores concreciones. Así entre declaraciones y filtraciones lo que se había venido conociendo era más la *filosofía* que estrictamente el *contenido* de la futura RET'84. Lo que no se puede descartar, total ni parcialmente, es la hipótesis de que UGT no sólo estuviera mejor informada de los propios planes del Ejecutivo –tal y como se puede observar por las actas de la CEC de UGT– sino que es posible que tuviera en su poder más de un documento que todavía no se había hecho público. Una hipótesis esta última no descartable – pese a que no se ha podido demostrar documentalmente– a finales de septiembre¹⁶⁹.

Todos y cada uno de los plazos previstos por el Gobierno frente al futuro proceso de concertación, se habían visto superados por el paso del tiempo, a pesar de que no faltarán las declaraciones más voluntaristas que otra cosa –empezando por las de Joaquín Almunia– de que no habría problema alguno en adjuntar la documentación que fuera necesaria de cara a afianzar la *confianza* entre los agentes sociales¹⁷⁰. Una “anómala” situación que puede conducir a dos hipótesis no contradictorias: a) en primer lugar, podría vincularse esta situación con las supuestas dudas e incertidumbres dentro del Gabinete Técnico de Trabajo en torno a los límites de la reforma del mercado de trabajo, a lo que también cabría añadirse las estrictas dificultades de redactar un proyecto de dicha envergadura; b) en segundo lugar, podría interpretarse esta forma de actuar como una política no tanto de “encubrimiento” y/o “ocultación”, pero sí de manejo de los tiempos políticos. Tan sólo así parece explicable que todavía a principios de octubre se siguiera informando de la existencia de varios “proyectos del Ministerio de Trabajo”, y que, en su caso, y dependiendo de uno o de otro exigirían o no “la modificación del Estatuto de los Trabajadores”.

Una indefinición acompañada por nuevos “globos sondas”, que hablaban de cómo las “nuevas empresas podrán tener todos sus trabajadores temporalmente contratados y las ya creadas podrán contratar sin topes cuantos trabajadores necesiten en forma temporal”. Más allá de algunas limitaciones que se preveían a esta tan deseada búsqueda de una *contratación temporal plena* –metáfora empleada a la hora de hablar de *flexibilidad radical*– podía también adivinarse diferentes posiciones de partida, dependiendo de si se trataba del equipo de Economía o de Trabajo. Un singular *reparto de papeles* entre “Malos” y “Buenos” con unas reglas de juego más o menos claras: a cada declaración fuerte venía la posterior declaración de desmentido por parte de una de las partes. Dentro de esta *perversa* dinámica, se filtraría, a principios de octubre, como los redactores del programa económico habían prometido a una importante representación de las Cámaras de Comercio implantar la “libertad contractual absoluta”. Un hecho rápidamente desmentido por el Secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien negaría la mayor y además afirmaría que no se pensaba tocar la contratación indefinida¹⁷¹. Esta situación de permanente provisionalidad que se mantendría hasta bien avanzado el propio mes de octubre.

¹⁶⁸ Ello a pesar de la *situación privilegiada* con la que contaba la UGT –tal y como se reconocía en los medios mejor informados– que le permitía «conocer con la antelación suficiente los proyectos que elabora el Gobierno». Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno reafirmará hoy a sindicatos y patronal su voluntad de reconciliación”, *El País*, 13 de octubre de 1983.

¹⁶⁹ Por citar una clara evidencia: a principios de octubre, y tal como se reconocía en un acta de la CEC de UGT, ya tenían en su poder los borradores de la futura LOLS, cuando no se habían hecho ni públicos ni había sido entregados a los demás interlocutores. AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 10. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 11 de octubre de 1983”, sig. 002251-003.

¹⁷⁰ Véase al respecto una relevante intervención de Joaquín Almunia en la Comisión de Política Social y Empleo el 10 de febrero de 1983, que se recoge en el apartado “10.2.3. Crisis y agonía final del *non nato* Acuerdo Interconfederal de 1984: el extraño caso del «proceso de hibernación parlamentaria» de la reforma del Estatuto de los Trabajadores (diciembre 1983-febrero 1984)”.

¹⁷¹ Noticia, “Las nuevas empresas podrán tener toda su plantilla con contrato temporal”, *El País*, 6 de octubre de 1983.

Entretanto, y a la espera de reiniciar la negociación colectiva y la propia RET'84, UGT emprendería, con afán constructivo, la ardua tarea de revitalizar el paralizado proceso negociador. Un papel de “agitador” que mal casaba con sus responsabilidades sindicales, pero que evidenciaban la necesidad que tenía para la central socialista alcanzar un pacto al precio que fuera, por las razones que hemos ido esgrimiendo. De ahí saldría la convocatoria de una reunión formal por parte de UGT y la CEOE para *tantear* el terreno. La fecha, el jueves 6 de octubre.

Desde la cómoda posición de la que disfrutaba la CEOE, la reunión sería un *sonado fracaso* al durar menos de 30 minutos. Ambas partes tan sólo coincidirán en la necesidad de modificar los anteriores parámetros por donde habían transcurrido las anteriores negociaciones. A saber, diferenciar, por un lado, la política salarial vinculada a sus tradicionales canales y llevar el resto de los temas a tratar a diferentes mesas sectoriales¹⁷². Una última propuesta de descentralización de la negociación colectiva que rechazada históricamente por los sindicatos de clase por sus lógicos y evidentes riesgos, en la citada ocasión, no generaría mayor problema en las filas ugetistas. Más todavía –como se informaba desde *El Socialista*– crecida la CEOE, ésta negaría la posible inclusión de una cláusula de revisión salarial para la negociación colectiva de 1984¹⁷³.

Junto a este pésimo resultado, para las aspiraciones ugetistas, igualmente, tampoco ayudaría a romper su aislamiento sus continuadas acusaciones contra las Comisiones Obreras, al calor del inicio de su política de movilizaciones con el objetivo de presionar para luego negociar, tal y como venía practicando desde el inicio de la transición a la democracia¹⁷⁴.

En paralelo a todo el anterior proceso de declaraciones públicas y de reuniones abiertas, la UGT había continuado con sus *reuniones bilaterales* del Gobierno desde finales de septiembre, con el objetivo de “ir acercando las posiciones de cada una de las partes en las materias que serán objeto de negociación los próximos días entre los distintos agentes sociales y económicos”. De hecho, manejarían en dicha coyuntura los tiempos políticos precisos, pues antes de que desde el Gobierno se realizará la convocatoria oficial con la que se pretendía dar el inicio oficial al proceso de concertación social –aunque limitado, como hemos visto, dado que no se negociaría ni los PGE ni el PEMP; la Ejecutiva ugetista conocía de antemano la fecha de reunión que se celebraría, finalmente, el 13 de octubre. Lo anterior se dice textualmente en un acta de la CEC de UGT que tendría lugar el martes 11 de octubre. No sólo, pues, como se ha adelantado en la citada reunión ya obraría en su poder, al menos, el pre-proyecto de la futura LOLS, cuando este no había sido entregado a ninguno de los restantes interlocutores sociales. Por lo demás, se expresaría una valoración positiva de su reunión con la CEOE, en donde se

¹⁷² Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT y CEOE estudian la posibilidad de acuerdo para la próxima negociación colectiva”, *El País*, 6 de octubre de 2010; Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE, a favor de que las subidas salariales para 1984 puedan ser pactadas por cada sector y no a nivel general”, *El País*, 7 de octubre de 1984.

¹⁷³ “UGT-PSOE: hacia la negociación”, *El Socialista*, nº 331, (p. 29). También se recogerían las palabras que Almunia brindaría a los delegados asistentes al Congreso de la Federación del Metal: «Estos son sacrificios que pedimos a los trabajadores a cambio de poder crear más empleos. Pero también se piden sacrificios al sistema financiero, a los empresarios y al Gobierno».

¹⁷⁴ «[Nicolás Redondo] [s]eñaló que Comisiones Obreras, en concreto, ha convocado más movilizaciones en los seis meses últimos que en los cinco años anteriores, y se preguntó por qué este sindicato tiene que ser tan beligerante con un Gobierno socialista, al que no concede la misma tregua que dio a los Gobiernos de UCD». Noticia, “Nicolás Redondo duda de la posibilidad de lograr un acuerdo interconfederal con Comisiones Obreras”, *El País*, 10 de octubre de 1983. Igualmente, Noticia, Carlos Fuente, “Nicolás Redondo muestra su apoyo al Gobierno y crítica al PCE y CCOO por poner en peligro las empresas públicas”, *El País*, 17 de octubre de 1983.

constaría la “voluntad de ambas partes de continuar con la política de concertación para los próximos años”¹⁷⁵.

Por tanto, a mediados de octubre, los movimientos internos y en la sombra parecían que empezaban a rendir sus frutos, exclusivamente esta última perspectiva, es decir, la ugetista. Un atisbo de esperanza tuvieron que ver los estrategias ugetistas cuando el Gobierno en aquellos mismos días anunciaría su “buena voluntad” y “deseos de concertación”. Todavía eran tiempos en que aquellos anuncios conservaban cierta *frescura* así como cierta *credibilidad*. Aunque con las mismas, el Ejecutivo dejara ya sentado que su participación sería, prácticamente, testimonial en relación a las materias de negociación. Una vez más, y como se comprobaría rápidamente, dicha declaración vendría a ser una muestra más de la retórica socialista antes que cualquier posible ejemplo de una decidida voluntad política. Y pese a lo dicho, y a fuerza también de un desmedido voluntarismo político, tales declaraciones no dejaban de tener una lectura positiva desde la óptica ugetista: el apoyo del Gobierno a sus tesis al mostrarse partidario del modelo hablado –que no acordado– de cara a descentralizar la negociación colectiva. Un aspecto al que se opondría radicalmente CCOO¹⁷⁶.

La *paciencia histórica* siempre ha constituido un punto fuerte dentro de las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda española. Incluso, ha rendido, alguna que otra vez, sus frutos. La presencia del propio Felipe González, escoltado por Miguel Boyer y Joaquín Almunia, en la reunión celebrada con los agentes sociales un 13 de octubre de 1983 con el fin de volver a retomar las cuestiones colindantes del PEMP, ayudaría a clarificar tres importantes cuestiones. Primero –y sin duda aquello constituiría una muy notable novedad– por primera vez de forma pública y oficial se hablaría de alcanzar un pacto social para el resto de la legislatura, que en palabras del Ministro de Trabajo sería “más importante que el Acuerdo Nacional sobre Empleo”. Una perspectiva con la que, hasta el momento, siempre había trabajado la UGT. Pero lo que no conocía –a buen seguro– la propia central socialista es que la citada propuesta ya había manejada por González, Guerra y Boyer en su reunión con Ferrer Salat y Cuevas en donde se llegaría al denominado pacto “El Parrillón” antes de diciembre de 1982¹⁷⁷. En segundo término, se acordaría un método de negociación aceptado por todos los implicados. Por un lado, Gobierno, patronal y sindicatos negociarían conjuntamente aquellos aspectos relacionados con el mercado de trabajo, aunque también se dejara apuntado que de aquellas reuniones “necesariamente no habrán de tener su reflejo en ningún «papel firmado»”. Es decir, se negociaría, por un lado, a nivel tripartito; y por otro, se abrirían diversas mesas bilaterales en torno a la cuestión salarial de cara a un posible acuerdo interconfederal. Y en tercer lugar, quizás el anuncio más importante de dicho encuentro sería la confirmación de que el Ministerio de Trabajo tenía ultimado el proyecto de reforma laboral¹⁷⁸. De aquel otoño encuentro en La Moncloa, saldrían más compromisos –que no acuerdos– que en todos los meses anteriores.

No tardarían en llegar los grandes titulares en el entorno socialista: “Política de comprensión”, era el titular de portada del número correspondiente de *El Socialista*, con la fotografía de González, escoltado por Redondo y Ferrer Salat, junto con Camacho separado del resto. En sus páginas anteriores y tras otro alentador titular –“Casi todos de acuerdo” – *casi* se

¹⁷⁵ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 10. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 11 de octubre de 1983”, sig. 002251-003.

¹⁷⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno reafirmará hoy a sindicatos y patronal su voluntad de concertación”, *El País*, 13 de octubre de 1983.

¹⁷⁷ Véase la *nota 19*.

¹⁷⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “Felipe González convenció a sindicatos y patronal para que concierten la política social para los próximos años”, *El País*, 14 de octubre de 1983.

daba por seguro el posible acuerdo, con la excepción de CCOO. Y así se podía leer la predisposición de UGT a pactar una nueva moderación salarial frente a su “oponente”¹⁷⁹.

Confiados y satisfechos, por tanto, saldrían los dirigentes de UGT de la primera –y a la par última– reunión del proceso de concertación social. No cabía duda: el Gobierno había abierto la posibilidad del diálogo social, según los propios interesados, lo que sin duda les reafirmaría en sus singulares creencias. Si previamente también desde UGT habían dejado claro a la CEOE que estaba por la labor de negociar –inclusive a nivel sectorial antes que a nivel general– una acusada moderación salarial; todavía menos dudas se tendrían con respecto a la voluntad política del Ejecutivo. El domingo 16 de octubre, en Oviedo, Redondo saldría en defensa del Gobierno pero sobre todo de su política económica. Anunciados los correspondientes sacrificios, no tendría reparo en afirmar como nos “[v]amos a dejarnos los dientes en defender a este Gobierno, para conseguir que culmine sus cuatro años de gestión y España pueda ser un país más moderno y solidario”. Leída como un éxito propio la incorporación de no pocas partidas sociales en los PGE de 1984 –que desde los propios medios socialistas, con Boyer, a cabeza, denominarían como los “presupuestos del sacrificio”¹⁸⁰– veía cada vez más cerca de realizarse el *nuevo modelo sindical propugnado*. Tan seguro de sus fuerzas se presentaría que anunciaría que habría concertación con o sin CCOO, a quien le lanzaría muy duras críticas por su posición politizada de la mano del PCE¹⁸¹.

Líneas de actuación que se reforzarían en la reunión de la CEC del 18 de octubre, en donde se hablaría de cómo había llegado el momento de “iniciar las conversaciones entre las distintas organizaciones”, tanto sobre las cuestiones *ad hoc* del PEMP como de cara a la negociación colectiva para 1984. Para tal empresa, de hecho, se crearían una serie de Comisiones y Grupos de trabajo. Pero lo que realmente centraría dicho encuentro sería el análisis de la “situación interna de CCOO”. Y, una vez más, tras revisar su estrategia, hablar de su supuesta “división interna” –al unísono de lo que *El País* venía repitiendo desde hacía meses– se elaboraría un comunicado –todo ello después de la “carta” filtrada al propio *El País*– para intentar atraer a los comunistas a la concertación bajo los presupuestos ugetistas. También en la citada reunión se previa la celebración de un Comité Confederal extraordinario ante el rumbo que tomarán las futuras negociaciones, que, en cualquier caso, se preveían cortas¹⁸².

A lo largo de la segunda quincena de octubre todo parecía transcurrir en medio de una aparente tranquilidad negociadora. Al menos en público y con carácter oficial. Tranquilidad relativa, pues desde Comisiones Obreras, tras la convocatoria de movilizaciones del día 5 de octubre, anunciaría una nueva jornada de lucha para martes 18 de octubre. Los argumentos para *salir a la calle* se había enriquecido: ya no era solo con motivo de la aplicación de las 40 horas, sino que a esta última reivindicación se le había sumado su oposición a una posible subida salarial del 6,5%, pero sobre todo había ganado enteros su posición contra la contratación temporal. Por más que desde la prensa se le quisiera restar importancia, exponiendo como *firme* argumento como tras las últimas reuniones, tales planteamientos había perdido sus fines en una

¹⁷⁹ Portada, “Política de comprensión” y “Casi todos de acuerdo”, *El Socialista*, nº 332, (1983), pp. 1 y 29, respectivamente. Un número que se abría con otra fotografía del propio González, con el Papa Juan Pablo II y Carmen Romero, en actitud firme. También en aquel número por primera vez se publicaría un largo artículo favorable a las tesis de trabajo al respecto de la flexibilización laboral: DARIO QUINTERO, José, “Mercado de trabajo y flexibilización” (p 30).

¹⁸⁰ “Los presupuestos del sacrificio”, *El Socialista*, nº 334, (1983), p. 27. Igualmente léase: Editorial, “Los presupuestos”, *El Socialista*, nº 337, (1983), p. 7.

¹⁸¹ Noticia, Xavier Vidal-Folch, “Nicolás Redondo muestra su apoyo al Gobierno y crítica al PCE y CCOO por poner en peligro empresas públicas”, *El País*, 17 de octubre de 1983.

¹⁸² AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 11. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 18 de octubre de 1983”, sig. 002251-003.

clara maniobra desmovilizadora¹⁸³; lo cierto es que el jueves 18 de octubre, Comisiones Obreras y el PCE conseguiría reunir a más de 50.000 personas tan sólo en Madrid –según datos del propio *El País*– en lo que, sin duda, se convirtió en un gesto de fuerza y de capacidad movilizadora. En la citada ocasión, no faltarían las críticas contra la política económica del Ejecutivo. Pero es que también aquel mismo día en diferentes partes del Estado, principalmente, en Valencia habría paros generales sectoriales que tendría un seguimiento relevante¹⁸⁴. Por su parte, y dentro de este mismo escenario, desde los medios de prensa socialista, tratarían –al igual que, en cierta parte, estaba llevando a cabo el anterior medio de comunicación citado– deslegitimar la campaña de movilizaciones de CCOO. Una estrategia basada en mensajes simplistas y dicotómicos –UGT, *sindicato responsable y negociador*; CCOO, *sindicato radical y politizado*– aunque para ello se tuviera que alterar la propia realidad social y económica¹⁸⁵. Unas crónicas que todavía radicalizarían su postura ante lo que sucedería durante el I Trimestre de 1984, en donde ya sin titubeos llevarían a cabo una exagerada manipulación, dando, asimismo, la necesaria cobertura a la estrategia desmovilizadora de UGT.

Las anteriores movilizaciones, de hecho, serían leídas como un gran éxito por parte de la CEC de CCOO el miércoles 19 de octubre. Allí se aprobaría una resolución en donde podía leerse como “el nivel de participación alcanzando pone de manifiesto la justeza del planteamiento de CCOO, su oposición a la política económica que viene siguiéndose, cuyo fondo es mejorar el excedente empresarial a costa de los trabajadores”. Asimismo se afirmaría como gracias a estas demostraciones se había conseguido arrancar al ejecutivo la “formación de una serie de mesas” de debate.

Agustín Moreno presentaría un informe sobre las perspectivas de la futura negociación colectiva, tras lo cual se acordaría las siguientes decisiones. Junto a la convocatoria de una reunión monográfica de la Ejecutiva para trazar la estrategia sobre el proceso de reconversión industrial prevista para el 7 de noviembre, se advertía como, en ningún caso, se puede “renunciar a negociar la unidad de acción con UGT” tanto en esa mesa como en las rentas. Negociar pero también continuar con las movilizaciones en línea de “combinar presión y negociación”.

Aunque no puede hablar de divisiones ni tensiones internas estrictamente, la aprobación de la postura de CCOO del 10% de incremento salarial “admitiendo la posibilidad de flexibilizarlo en las futuras negociaciones, según las contrapartidas”, recibiría 10 abstenciones, un voto en contra, y 16 votos a favor. Más allá de las discrepancias coyunturales, en todo caso, se saldrían al paso de posibles dudas cuando se afirmaría como el último fin de CCOO de cara a la negociación, pasaba por “modificar las líneas de la política económica general y sus contenidos concretos”. El fin: “obtener resultados que permitan acuerdos más o menos amplios que debe ser correspondidas por las otras partes”, con una posición firme frente al escenario contemplado de que los trabajadores seguirían perdiendo poder adquisitivo o la “generalización de la contratación temporal y precaria”¹⁸⁶.

¹⁸³ Noticia, “CCOO convoca movilizaciones en tres ciudades españolas”, *El País*, 18 de octubre de 1983.

¹⁸⁴ Noticia, “Más de 50.000 personas se manifestaron ayer en Madrid a favor de las jornadas de 40 horas”, *El País*, 19 de octubre de 1983.

¹⁸⁵ Por ceñirnos tan sólo a los meses de octubre a diciembre de 1983 en las páginas de *El Socialista* –junto con lo ya apuntado– se publicaría casi a ritmo de cada número una crónica laboral en esta línea, incluso llevando tal información a la sección de *Crónica política* según la ocasión: “Comisiones se lanza al pozo”, n° 329, pp. 26-27; “Las interesadas movilizaciones”, n° 331, p. 8; “Una huelga a las espaldas de UGT”, n° 331, p. 30; “Astilleros españoles. Una batalla naval y campal”, n° 336, pp. 32-32; “Un sindicato negocia, otro hace huelgas”, n° 338, p. 32; “La agitación de Comisiones”, n° 340, p. 32.

¹⁸⁶ AHT, CCOO-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal del día 19-X-1983”, sig. 001-00036, junto con la citada “Resolución de la Comisión Ejecutiva”.

Redactado y cerrado el proyecto de la RET'84 y con el innato espíritu negociador tan típico de los dirigentes socialistas, se continuaría con la campaña de “globos sonda” hasta la entrega, por fin, de la documentación pertinente en noviembre de 1983. En este clima pre-negociador desde el Ministerio de Trabajo se trataría de lanzar una serie de mensajes tranquilizadores: la enésima declaración de que el Gobierno socialista no propondría el despido libre; los deseos en la voluntad negociadora; la necesidad de superar un marco de regulación rígido pero que, en cualquier caso, no afectaría a los trabajadores con contrato indefinido; la preservación de ciertos mecanismos reguladores para evitar la sustitución de *fijos* por *temporales*.... Justamente estos dos argumentos últimos se emplearían con insistencia en aquellos días. Un tono conciliador que, en todo caso, tenía sus límites: “es posible negociar, pero lo que no es pactable es que el Gobierno [no] gobierne. Podemos llegar a un acuerdo sobre cotizaciones a la Seguridad Social, pero hay discrepancias y seguirá habiéndolas”, señalaría por aquel entonces Joaquín Almunia¹⁸⁷.

Afirmaciones, declaraciones, que no sólo ponían, de nuevo, a UGT contra las cuerdas, ante su posición contraria, de entrada, a tales planes. Y como había sucedido, de forma previa, tampoco faltarían las rotundas críticas por parte de determinadas uniones y sectores contra Almunia y su política laboral. De esta forma, a principios de noviembre, saltaba a la prensa como durante el VIII Congreso de la Federación de Construcción de UGT, se aprobaría un voto de censura contra el propio Ministro, a quien se le pedía directamente la dimisión. Todo ello tras recordarle el programa electoral, y anunciar que se opondrían totalmente contra la “universalización de la contratación temporal”¹⁸⁸. En resumen, ni dentro de la *familia socialista* se era capaz ya de mantener la disciplina ante los proyectos liberales del Gobierno.

Los porqués y las causas de los sucesivos retrasos de convocar de una vez por todas, las mesas correspondientes para negociar el *pack legislativo* de la reforma del mercado de trabajo, tan sólo se podía interpretar como una estrategia –tal y como había sucedido con los PGE o el mismo PEMP– para llegar a un marco negociador sin margen real de maniobra ante la falta de tiempo. Mientras que Trabajo se seguiría sin convocar el inicio de las negociaciones, se conocería, por ejemplo, como el Gobierno había finalizado el proyecto de reconversión naval –que guardaría en un cajón hasta el final del conflicto de Sagunto– a la par que trataba de mostrarse firmemente ante la opinión pública, al asegurar que los sindicatos que no aceptarían tanto ese plan como otros tantos, serían excluidos de las comisiones de seguimiento¹⁸⁹. Un mensaje que se lanzaría en la primera considera reunión oficial de la concertación social, por parte de Solchaga. Todo ello en su encuentro con CCOO, UGT y ELA-STV, a finales de octubre, para hablar, antes que discutir, sobre el proceso de reconversión industrial. No sin pocas dosis de razón, Agustín Moreno hablaría de una “política de chantaje”.

Así pues, todo parecía indicar que el protagonismo de lo que pudiera firmarse o no firmarse, iba a depender de UGT. De este modo, a lo largo de la última semana de octubre pondría en marcha una triple estrategia combinada. En *público*, Redondo, a la cabeza, anunciaba que habría acuerdo interconfederal, así como se mantenía inalterado el apoyo gubernamental. Acompañándose tales afirmaciones con un doble mensaje dirigido a CCOO:

¹⁸⁷ Noticia, “La contratación temporal será ampliada, según Almunia”, *El País*, 28 de octubre de 1983.

¹⁸⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT de la construcción aprueba un voto de censura contra el ministro de Trabajo”, *El País*, 2 de noviembre de 1983. En esta misma línea se expresaría un inusual artículo crítico contra la política laboral socialista publicado en *El País*: FINA, Albert, “Las anunciadas medidas laborales”, *El País*, 26 de octubre de 1983. Por otro lado, con no poca preocupación se observaría tal ‘oposición’ desde las páginas del órgano de prensa del PSOE: PADILLA, Sol, “Dureza reivindicativa”, *El Socialista*, n° 335, (1983), pp. 30-31.

¹⁸⁹ Noticia, Carlos Gómez, “El Gobierno ha finalizado ya el plan de reconversión industrial”, *El País*, 28 de octubre de 1983; Noticia, “Los sindicatos que no acepten la reconversión serán excluidos en las comisiones de seguimiento”, *El País*, 28 de octubre de 1983. Véase también: Noticia, Manuel Rivas, “Camacho opuesto a ceder sin condiciones en la reconversión”, *El País*, 29 de octubre de 1983.

mientras que llamaba a la concertación no dudaría en calificarlos, en la práctica, de *locos* ante su estrategia movilizadora adoptada¹⁹⁰. En *privado*, en la reunión de la CEC de UGT del 26 de octubre, junto a las decisiones de calado adoptadas, la lectura de su acta nos revela, además, un hecho fundamental: la Ejecutiva de UGT ya tenía en su poder el documento base de la futura reforma del ET. Si en anteriores actas se había constatado como obraba también en su poder el proyecto de la LOLS, ahora se confirmaba todas las hipótesis previamente manejadas. De esta forma se afirmaba:

«En lo referente a la negociación sobre el mercado de trabajo se analiza el documento entregado por la Administración sobre dicha materia, y se rechaza el contenido del mismo, así como la forma de llevarlo a cabo, esto es, a través, de la modificación del Estatuto».

¿Desde qué fecha la CEC de UGT contaba con el documento? Se desconoce, pero, por las evidencias, sumadas no podría descartarse que se hubiera recibido tras la anterior reunión de la CEC del 18 de octubre. No obstante, lo que queda así evidenciado documentalmente es el trato de favor a UGT, en tanto al resto de los interlocutores sociales no les entregaría el mismo hasta una semana después. Lo que también quedaba demostrado era su rechazo frente los planes de Trabajo. Así se “acuerda realizar gestiones con el Gobierno, para que modifiquen la actual filosofía que sobre este problema mantiene en la actualidad”. A saber, vuelta a la *vieja* estrategia de tratar de alcanzar un “acuerdo por arriba” antes del inicio oficial de las negociaciones. Con todo, la situación de partida no era sencilla: tal y como venía redactado tal proyecto, no podía ser apoyado por UGT¹⁹¹. Entonces, ¿qué hacer?

De entrada, y como era habitual, de forma repentina endurecía sus posiciones frente al inminente proceso negociador, más tras conocerse los planes gubernamentales en materia de reconversión industrial. Quedaba así planteada la tercera pata de la estrategia ugetista, a la hora de marcar diferencias tanto políticas como en materia de contenidos. Una estrategia planteada para no verse arrollada por la realidad. No obstante, se trataría de un endurecimiento bastante relativo. A partir de ahí no sólo se centraría en la búsqueda de evidentes contrapartidas visibles –la reforma de la Ley Básica de Empleo o la propia reforma de la Seguridad Social– o no visibles, o directamente negociadas en secreto para justificar a *posteriori* la extensión de la contratación temporal. Por otro lado, marcaría en el terreno público-mediático lo que consideraba como las “condiciones irrenunciables”. Mediante una filtración directa desde la calle San Bernardo a Rodolfo Serrano dejaba así asentada estas mismas condiciones: Corcuera y Zufiaur a la salida de la reunión de la Ejecutiva expresarían su rechazo a “la generalización de la contratación temporal”. Lo que traducido en otros términos significaba una oposición a una modificación del Estatuto de los Trabajadores, de cara a suprimir el carácter excepcional de la contratación temporal. Otro tanto sucedería con los excedentes de plantilla en relación a la reconversión industrial o la defensa del 8% frente al 6,5% propuesto por el Ejecutivo¹⁹².

Y, por fin, después de tantos meses de espera, llegaría la convocatoria oficial para hablar la reforma del mercado. De esta forma, el 4 de noviembre de 1983 se entregaba públicamente a todos los agentes sociales el documento, *Reforma del mercado de trabajo, fomento del empleo y protección del desempleo*¹⁹³. Un texto que venía a expresar una suma de

¹⁹⁰ Noticia, Nicolás Redondo ratifica que habrá acuerdo interconfederal para el próximo año”, *El País*, 24 de octubre de 1983.

¹⁹¹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 12. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 26 de octubre de 1983”, sig. 002251-003.

¹⁹² Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT impone al Gobierno condiciones para la concertación”, *El País*, 29 de octubre de 1983.

¹⁹³ El citado documento en su versión original pudo ser localizado a través del Fondo de la Secretaria de Acción Sindical de UGT. En concreto en una carpeta, acompañada de una carta de Joaquín Almunia a Nicolás Redondo. En la misma se podía leer –conociendo previamente como la CEC de UGT ya tenía en su poder el citado documentos–: «Querido amigo: Con objeto de iniciar el proceso de concertación sobre los capítulos del Programa Económico a medio plazo, más directamente relacionados

intenciones y de buenas voluntades, antes que un proyecto de reforma laboral en profundidad¹⁹⁴. De hecho, el documento con un articulado definido en torno a la RET'84 tardaría todavía más de dos semanas en entregarse en un claro y nuevo ejemplo de control de los manejos de los tiempos políticos por parte del Gobierno.

La localización de este documento no resultó sencilla en su día. Más tras la respuesta “negativa” desde el Archivo Central del Ministerio de Trabajo a nuestras peticiones. En todo caso, finalmente se pudo dar con una de las primeras versiones –fecha, precisamente, el 4 de noviembre, aunque ya hemos dejado constancia que desde la CEC de UGT, al menos, se tenía, de forma previa, en su poder otro *borrador* aunque desconocemos si era este mismo u otro– a través de una “carta-circular” de la Secretaria de Acción Sindical del 7 de noviembre, y dirigida a la “Uniones Territoriales” y a las “Federaciones de Industria”¹⁹⁵. Antes de entrar en un breve análisis del citado *documento*, quizás convenga –dado lo que sucedería en pocas semanas– repasar la posición, tanto pública como interna, de la UGT desde la salida de su XXXIII Congreso con respecto a la contratación temporal de forma monográfica. En especial, nos detendremos en la posición “no pública” –o si se prefiere *técnica*– de la central socialista, a través de toda una serie de informes elaborados por su competente Gabinete Técnico Confederal.

«Desde una óptica sindical no resulta aceptable la inestabilidad en el empleo no sólo por este hecho en sí, sino por las consecuencias sindicales que conlleva la temporalidad del contrato. Ahora bien, en una situación como la que venimos padeciendo, la Unión General de Trabajadores acepta la contratación temporal, siempre y cuando esta relación contractual esté orientada desde la perspectiva de un programa de fomento al empleo.

Evidentemente, es infinitamente mejor tener un trabajo aunque solo sea por un corto espacio de tiempo, que encontrarse en desempleo

[...] [E]l Sindicato desde una posición responsable no puede por menos que aceptar cualquier medida mitigadora del mismo por difícil, en principio, que ésta sea.

Desde ese prisma la Unión General de Trabajadores acepta la contratación temporal».

Desde esta forma, y bajo estos planteos, quedaba definido lo que se denominaba el “Posicionamiento de UGT ante la contratación temporal” en un *informe* del Gabinete Técnico

con las competencias de este Ministerio, tengo el gusto de convocarte a una reunión a celebrar el próximo viernes día 4, en la Sede del Ministerio [...]. En principio la hora de la reunión sería a las 16.30, conjuntamente con CCOO y el número de componentes en representación del Ministerio no sería superior a cinco». AHFFLC, “Carta de Joaquín Almunia –Ministro de Trabajo y Seguridad Social– a Nicolás Redondo –Secretario General de UGT–”, Madrid, 2 de noviembre de 1983, sig. 002902-008.

¹⁹⁴ Noticia, “Sólo uno de cada cuatro parados recibe cobertura de desempleo”, *El País*, 5 de noviembre de 1983. No casualmente al día siguiente de empezar el citado proceso de negociación el mismo medio de comunicación publicaba un artículo de José María Corell y María Paz Pardo, ambos miembros de la Corriente Socialista Autogestionaria de CCOO, quienes, a su vez, se habían mostrado críticos con la dirección de la central ante la actitud adoptada por ésta en relación a posteriores negociaciones. Un texto en donde tras marcar las distancias oportunas con respecto a la política del Ejecutivo socialista, defendían la necesidad de negociar y concertar, con argumentos cercanos a los defendidos por UGT. Así pese a afirmar como «[h]abrás cosas, como la contratación temporal, que jamás podremos aceptar», terminaban su artículo diciendo lo siguiente: «Creemos que hay posibilidades para una buena negociación, que la solidaridad frente a la crisis la hace indispensable, que la democracia sigue requiriendo un clima social sin crispaciones y que, en último término, el sindicalismo y nuestra propia confederación saldrán beneficiados con ello, demostrando a todos que sólo nos mueve la defensa de los trabajadores –de todos los trabajadores: pasados o con trabajo, afiliados o no–, con total independencia de intereses ajenos». CORELL, José María y PARDO, María Paz, “Es imprescindible negociar”, *El País*, 5 de noviembre de 1983. Meses después, véase: Noticia, Rodolfo Serrano, “La Corriente Socialista de Comisiones Obreras denuncia la radicalización del sindicato”, *El País*, 28 de marzo de 1984.

¹⁹⁵ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Acción Sindical, “Carta-Circular de José Luis Corcuera – Secretario de Acción Sindical– a las Uniones Territoriales y a las Federaciones de Industria”, Madrid, 7 de noviembre de 1983, sig. 001871-002.

Confederal de abril de 1983. La posición de partida, en torno a esta delicada cuestión, quedaba, por tanto, clara. De hecho, la frase clave de las anteriores palabras se podía localizar al final del primer párrafo citado.

Pero aquel *informe* iba todavía más lejos en sus valoraciones y toma de posiciones. Así recordaba como la “oposición sindical a la contratación temporal [...] viene motivada por la utilización de éste tipo de contratos como medida o instrumento para conseguir la flexibilización de plantillas”. Los resultados y datos aportados, claro está, caminaban en esta dirección. Así mismo se indicaría como “podemos afirmar y aunque solo sea de forma general, que gran parte de estas supuestas «rigideces» se han suprimido desde 1978”, en un mensaje hacia la CEOE, y sin mencionarlo al Ejecutivo. Y de cara a ciertas peticiones de la patronal se afirmaría:

«En conclusión, el Sindicato ve con preocupación como por la vía de la contratación temporal se intenta conseguir una flexibilización total de plantillas, violando el espíritu de la contratación temporal entendida ésta como un programa de fomento al empleo y no una mera fórmula de despido libre».

Tras repasar toda la legislación que se había producido en los años anteriores, sin entrar, por cierto, en más detalles por el momento sobre la actitud adoptada por el Gobierno socialista unos meses antes, se advertiría como la “UGT entiende que ha existido una excesiva modificación de la Norma [temporal]”. Así la central socialista dejaría ahí también asentada su posición: existía la suficiente flexibilidad y no tenía sentido seguir aumentando la misma, a través de pequeñas modificaciones siempre en una misma línea.

«Han existido y existen en la actualidad una amplia gama de posibilidades a efectos de contratación y que en su mayor parte quizás por desconocimiento, quizás por una falta de confianza del empresariado, no son utilizadas en su mayoría. Pensamos así mismo que no se debe seguir por el camino de modificaciones parciales y frecuentes a los programas de fomento al empleo y en concreto a la contratación temporal»¹⁹⁶.

Poco a poco, la UGT se iría cargando de razones de cara a los frecuentes anuncios que no dejaban de cesar sobre la “inminente” reforma del mercado de trabajo. Cuando todavía era probable que ni siquiera obrara en su poder ningún documento “oficial”, se elaboraría un documento interno desde la Secretaría de Acción Institucional en julio de 1983. A saber, antes de la *campana de verano* pro-flexibilización. En el mismo se procedería a revisar y actualizar su posición cada vez más a la *ofensiva* manteniendo que la flexibilidad alcanzada había llegado a su máximo:

«Reformulación de los programas y nuevas fórmulas de contratación con el fin de no desnaturalizar la contratación y evitar la flexibilidad de plantillas. Flexibilidad ésta que ya consideramos tope máximo, y que puede mantenerse dado el carácter excepcional de la crisis.

Dotar posteriormente a los programas de una continuidad en el tiempo y no modificar periódicamente las normas que en nada favorecen la efectividad de las mismas».

Con las anteriores palabras quedaban, otra vez, fijada la posición contraria de la central socialista frente a una posible ampliación de la contratación temporal. Más cuando se comprobaba como tanto los contratos para determinados colectivos por la vía de la subvención como los contratos temporales ordinarios, cubrían, en un principio, las necesidades de los empleados. A partir de esta misma realidad constatada, al mismo tiempo, se denunciaría lo que parecería responder a una *operación encubierta*. En concreto se indicaría:

¹⁹⁶ AHFFLC, UGT, Gabinete Técnico Confederal, “La contratación temporal y el empleo”, Madrid, abril de 1983, sig. 002288-002, pp. 1, 2, 3, 4, 7 y 12, respectivamente. Un informe que concluía de la siguiente forma: «No existe una relación directa entre el número de contratos temporales y la evolución del paro y del empleo, y en todo caso se podría llegar a afirmar que la vista de los datos a más número de contratos temporales ha correspondido un mayor ritmo de crecimiento del paro y un mayor ritmo de descenso en la población asalariada ocupada. Pero que esta afirmación no debe tenerse en cuenta al no existir un conocimiento real sobre el efecto de los programas de fomento al empleo» (p. 13).

«Se debe mantener las actuales posibilidades de estos contratos, sin introducir nuevas ‘facilidades’ para flexibilización de plantillas.

Consideramos absurdo, el ampliar los márgenes vigentes, cuando no han sido utilizados ni en un 10% de sus posibilidades de contratación, salvo que lo que se pretenda no sea el realizar un mayor número de contratos y sí una flexibilidad de plantillas».

Aquí vendría a sumarse una pequeña-gran novedad al referirse a la Orden Ministerial de mayo de 1983, para señalar, ante la política de hechos consumados, lo siguiente:

«Cabría la posibilidad de clarificar el artículo 1º de la Orden Ministerial de 9 de Mayo de desarrollo del RD 3887/1982 de Diciembre. Asimismo se podría pensar en reducir el período mínimo de contratación siempre y cuando generase derechos para el cobro de las prestaciones por desempleo.

Como régimen general de estos contratos, UGT entiende que debe persistir el carácter extraordinario y coyuntural de la norma»¹⁹⁷.

También por aquellas fechas desde el Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, se iba a elaborar un largo como valioso informe acerca de la evolución y uso de las medidas laborales aprobadas y desarrolladas entre 1975 y 1983. Un documento con el que, por un lado, se pretendía dar respuesta a numerosas demandas sindicales de mayor información estadística, y por otro, serviría de base estadística para la elaboración del futuro proyecto de RET’84.

Fechado también en julio de 1983, y por tanto en pleno periodo de elaboración de las propuestas de reforma laboral, se resaltarían las siguientes características. Primero, se constataba el espectacular incremento del desempleo. En datos puros y duros, entre 1975 a 1982 el paro, tanto a través de la EPA como del INEM, había experimentado un “avance ininterrumpido, lo que en cifras absolutas se traduce en un aumento cercano a 1.800.000 personas, cifras esa cinco veces la inicial”. En suma, se había pasado de un 3,7%, a más del 17%, “lo que representa haberse multiplicado por más de cinco veces su valor original”. Igualmente, por vez primera, se haría también constatar la profundidad y gravedad de la “llamada economía oculta”, “lo que significa es que estamos supervalorando en este caso las cifras de desempleo”, se concluía, sin entrar en mayores valoraciones. Y en lo referente a lo relacionado con el desempleo por edades se aportaban los siguientes alarmantes datos:

«En cuanto a la distribución por edades, el 54% de los parados tiene menos de 25 años, lo cual da idea del elevado grado de concentración del mismo entre los jóvenes. Ese porcentaje es mayor para los mujeres (68,8%) que para los varones (46,1%): las mujeres jóvenes están en peor situación que los varones jóvenes, aspecto éste que se comprueba también al observarse, en las primeras, tasas de paro más elevadas que en los segundos».

No terminaba ahí la gravedad de la situación de desempleo, pues el incremento de los PDL se había constituido en un común denominador: “La situación más grave es la de aquellos que llevan más de dos años parados, lo cual afecta a la cuarta parte de los desempleados actuales”.

Ya en lo referido tanto a los programas de fomento del empleo como en lo que respectaba a la evolución de la contratación temporal, y por más que el *frio informe* no permitiera acercarse a otras realidades socio-laborales, los datos parecían del todo concluyentes sobre el empleo de estos mecanismos por parte de los empleadores. Se reconocería, primero, como de los citados programas de fomento al empleo “sólo los dos aludidos (jóvenes y subsidiados) tuvieron un reflejo contable importante”, significando el “35% del total de las colocaciones”. Unos programas que habían tenido un enorme costo monetario en un momento de dura crisis, y que entre 1978 a 1983 habían superado en conjunto los “110.000 millones de pesetas [...] de los cuales el 92% corresponde a bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social”. Es decir, la apuesta empresarial era clara. A lo anterior había que sumarle “los fondos

¹⁹⁷ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Mercado de Trabajo (Programas de Fomento al Empleo y nuevas fórmulas de contratación)”, Madrid, julio 1983, sig. AI-195-05.

destinados a Empleo Comunitario, que ascienden a unos 123.703 millones desde 1975 hasta la fecha”.

Tan altas habían sido las facilidades dadas a tales figuras, que las mismas habían restado *atractivo* a la contratación temporal por la vía del artículo 15 del ET’80, según los datos y la valoración de Trabajo. De esta forma, tan sólo se firmarían poco más de veinte y un mil contratos durante 1982, lo que venía a representar el 18,7% del total de las colaciones. Así pues, parecía poder deducirse que las preferencias de los empleadores no giraban tanto en relación a los límites –las llamadas *rigideces*– legislativas como a las posibilidades de conseguir una subvención por contratar¹⁹⁸.

A pesar de la publicación del anterior citado documento de Trabajo, desde la UGT, y en concreto desde su Gabinete Técnico Confederal, no cesarían las críticas contra la falta de información estadística. En otro *informe* fechado, en esta ocasión en agosto de 1983, se volverían a revisar la evolución tanto legislativa de la contratación temporal como de sus principales efectos. Vaya, por delante, que los datos que manejaría UGT no cuadrarían con los proporcionados por Trabajo, en otro ejemplo de la falta de fiabilidad estadística unificadora de las cifras sobre la realidad laboral.

Tanto en este *informe* como en otro documento de octubre de 1983, se van a demostrar dos importantes efectos perversos de la extensión de la temporalidad. Una lectura de estos efectos y/o consecuencias, que va a dar lugar a un *nuevo enfoque* más completo por parte de la UGT a esta cada vez más creciente realidad. La primera gran constatación es como a mayores dosis de flexibilidad legislativa, mayor era la ofensiva empresarial para eliminar todos y cada uno de los pequeños límites equilibradores y en busca de su uso *no fraudulento*, que el legislador habían ido fijando en cada normativa.

«Hasta la fecha, la orientación teórica que la legislación ha conferido a la contratación temporal ha sido de fomentar el empleo, utilizando estos contratos como un instrumento mitigador del paro.

Sin embargo se observa que es precisamente cuando más se amplían las posibilidades de la contratación temporal, incluso combinándola con otras formas de contratación e incentivándola mediante bonificaciones, cuando aparece un rechazo más fuerte por parte de ciertos sectores empresariales hacia esas normas reguladoras y asistimos a que no sólo se habla de una mayor flexibilidad de los contratos temporales sino que se llega a hablar, de forma subrepticia, del despido libre al querer vincularlo de alguna forma a esta modalidad de contratación».

A mayor ofensiva empresarial, mayor endurecimiento –al menos teórico como técnico– por parte de UGT en relación a la contratación temporal. De forma concreta, a la central socialista le parecería en extremo grave la obsesión empresarial de eliminar los *porcentajes de plantilla* por centro de trabajo de cara a la contratación temporal, que se venía dando en los diferentes RRDD. ¿Se estaba ante algún otro tipo de *operación encubierta*? Fuera o no así, allí se aportaba un dato novedoso a tener presente, pues pese a la posibilidad de ampliar los citados porcentajes mediante una solicitud a la Comisión Ejecutiva del INEM, se señalaría como en “dos años ninguna empresa ha tenido necesidad de recurrir a esta fórmula de ampliación, por haber cubierto previamente su cupo porcentual”. Por tanto, se podía aventurar que la *ofensiva empresarial* estaba dirigida por otros fines no explícitos.

A lo anterior, además, se sumaba la falta de información sobre la utilización real de tales medidas. En clara alusión indirecta al documento de Trabajo se afirmaríase con rotundidad:

«El hecho de que al hablar de la evolución de los Programas de Fomento al Empleo únicamente se hable del número de contratos, es una prueba de ello [*de la falta de un estudio a*

¹⁹⁸ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, *Sinopsis sobre mercado de trabajo y política de empleo en España: 1975-1983 (Análisis de las estadísticas, y relación de las medidas adoptadas)*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, julio de 1983, pp. 29, 30, 38, 42, 54, 57, 58 y 61, respectivamente.

fondo]. Reiteradas veces la propia Administración incluso en el anterior Gobierno, ya había puesto de manifiesto el desconocimiento real del efecto que los Programas de Fomento al empleo está teniendo en el mercado de trabajo y sus consecuencias, y reiteradas veces desde 1981, el Consejo General del INEM viene reclamando dicho estudio.

Podríamos señalar que en estos momentos se desconocen, por citar un ejemplo, qué número de los contratos temporales se convierten en fijos, la rentabilidad de las subvenciones de estos programas, qué número de los contratos se prorrogan, etc.

En definitiva, solamente podemos hablar del número total de contratos sin tener un conocimiento de la efectividad de los mismos».

De la misma forma, se insistiría, en adelante, en otro *efecto negativo* de la contratación temporal. Resultaba que también a mayor cuotas de flexibilidad legislativa, a mayor número de contrataciones temporales, mayor aumento de desempleo. Se estaba ante posible una *causa-efecto*, se interrogarían desde la UGT. Difícilmente se podía dar una respuesta debido a la falta de mayor concreción estadística. En cualquier caso había datos altamente *sospechosos*: “Por ejemplo en 1982 con 358.838 contratos el paro crece en 246.600 y la población asalariada ocupada descende en 20.000”. Cifras que como hemos visto no coinciden, a su vez, con las de Trabajo. Por tanto, una nueva hipótesis analítica a la par que política empezaba a visualizarse. Una hipótesis clave para entender los fundamentados temores de UGT ante los proyectos gubernamentales:

«Sin embargo, de las citadas cifras, creemos totalmente lícito reiterar la conclusión de que la contratación temporal no ha sido ni fundamental, ni tan siquiera importante a la hora de mitigar el paro, contrariamente a lo que se quiere hacer ver por parte de ciertos sectores. Cabría, incluso, preguntar si la contratación temporal no ha inducido ciertos despidos (luego más paro) incentivados por la posibilidad de sustituir puestos de trabajo fijos por temporales y conseguir por esa vía indirecta la famosa flexibilidad de plantillas.

Pero aún renunciando a esta ‘maquiavélica’ interpretación o admitiendo que los efectos beneficiosos (incentivar contratación) superan a los negativos (incentivar despidos), parece evidente que la contratación temporal no deja de ser una medida más de las llamas políticas de oferta en el mercado de trabajo, de peso muy relativo y de poder muy reducido en la lucha contra el paro en un momento de crisis aguda como la actual»¹⁹⁹.

A reconfirmar todas estas sospechas se sumaría un documento manejado por la Oficina de Prensa Confederal el 10 de octubre, y elaborado por el propio Gabinete Técnico Confederal. Todo ello, en plenas conspiraciones y pre-negociaciones de la futura RET’84 y en unos momentos en que la UGT iba un paso por delante del resto de los interlocutores en relación a los planes gubernamentales. Allí se analizaría la evolución de las “contrataciones realizadas durante los meses de junio y julio de 1983 así como el total acumulado en los siete primeros meses del año en curso”. Cifras, de nuevo, muy alejadas por las dadas por Trabajo. Como decíamos, los datos no dejaban lugar a dudas, y bien podía resumirse en cómo la contratación temporal funcionaba razonablemente.

«En base a los datos anteriormente expuestos, el Gabinete Técnico Confederal de UGT opina que son tres los puntos o ideas generales que se han dado durante el período transcurrido: En primer lugar, es la contratación temporal la que mayor número de contrataciones realiza, ya que supone un 54,14% del total. Le sigue en importancia los contratos para determinados colectivos (que vienen a suponer el 14,92%), contratos temporales subvencionados, al tiempo que se señalan los contratos de carácter territorial, en tercer lugar de importancia, con un porcentaje del 10,57%»

Todo ello para concluir, advirtiendo como “no es precisamente los contratos temporales lo de peor funcionamiento en estos momentos en el mercado de trabajo”, tras señalar: “No parece por lo tanto justificable el afirmar que la contratación temporal no funciona”²⁰⁰.

¹⁹⁹ AHFFLC, UGT, Gabinete Técnico Confederal, “La contratación temporal y el empleo”, Madrid, agosto de 1983, sig. AI-618-05 [localizado en el Fondo de la Secretaria de Acción Institucional].

²⁰⁰ AHFFLC, UGT, Gabinete Técnico Confederal, oficina de Prensa Confederal, “Mercado de Trabajo”, 10 de octubre de 1983, sig. 002280-001.

En suma, como se acaba de evidenciar la posición política, técnica como estratégica de la UGT, parecía evidente y bien definida antes de iniciarse las negociaciones de la RET'84. Por esta misma razón, el vuelco a sus posicionamientos al aceptar y firmar semanas después el texto base de la futura Ley 32/1984, será espectacular, dejando en papel mojado todo lo anterior.

Con la presentación a los agentes sociales del documento *Reforma del mercado de trabajo, fomento del empleo y protección del desempleo*, finalizaba la primera etapa de dudas como de ambigüedades buscadas de la política laboral de los socialistas españoles²⁰¹. Una etapa de transición que se había recorrido a una tremenda velocidad en un único sentido, hasta ser coparticipes de las nuevas políticas laborales en auge. A saber, los socialistas, en este caso desde el Ejecutivo como desde Trabajo pero también desde el Partido, se transformarían en la *vanguardia* de la “filosofía de la flexibilidad”.

Es a partir de este mismo punto de partida, desde donde se debe analizar la *filosofía reformista laboral* contenida en el citado documento de Trabajo. Más tras todo lo que había sucedido en el *movido* verano del ochenta y tres. De cualquier forma, al final se optaría por una apuesta liberalizadora/flexibilizadora gradual que, al menos, asegurara la posibilidad de negociación y acuerdo con UGT. Una *particular* apuesta que pronto mostraría sus insuficiencias, considerándose, en adelante, como incompleta dentro de la filosofía ya descrita.

Antes de entrar en el examen del propio documento, resulta del todo conveniente advertir un par de cuestiones básicas. La primera, por más que pueda resultar obvia, es que estamos frente un borrador inicial, que se modificaría en aspectos sustanciales en las siguientes semanas. La segunda cuestión a reseñar –teniendo presente que en el apartado “12.4. El «gran salto adelante»” se examinará el contenido definitivo de la Ley 32/1984, junto con el *pack legislativo* que lo desarrollará y en donde, además, se compararan el resultado final frente a los proyectos iniciales²⁰²– es un hecho de primer orden: resultaría que el primer borrador se incluiría toda una serie de medidas y prevenciones que regulaban de forma específica la contratación temporal, y que van a desaparecer durante la negociación. Asimismo, en este primer borrador no se introduciría la figura principal y, a su vez, más definitoria de toda la RET'84, como sería la de *lanzamiento de nueva actividad*. Por tanto, y aunque la documentación técnica sobre el desarrollo y la configuración de los sucesivos borradores es prácticamente inexistente, una primera valoración de cierto calado se puede dejar planteada, aunque sea en formato de mera *hipótesis*: la capacidad de presión y negociación de la UGT, en línea con su política en torno a la contratación temporal, sería enormemente limitada. De hecho, sus aportaciones, por más que se las quisieran revestir de mayor importancia, serían mínimas a la hora de la configuración del proyecto de la RET'84. Más todavía cuando se evidencian no pocas cesiones de enorme relevancia. Por último, indicar que tan sólo aquí se hará mención de la primera y segunda parte del proyecto –en concreto, en relación a la futura como nueva redacción de los artículo 11, 15 y 17.3– no entrando a analizar las bases de la futura Ley 31/1984.

Sin más dilaciones cabe afirmar que las primeras páginas del documento de Trabajo vienen a presentar y a cimentar la *filosofía y dirección* ya descritas, y que se concretarían, a la postre, en la futura Ley 32/1984. Un borrador inicial en donde muchos de sus epígrafes serían, posteriormente, trasladados literalmente –sin apenas, modificaciones– a la *Exposición de Motivos* de la citada normativa. De esta forma, el recorrer tales párrafos ayuda a reconfirmar las nuevas bases conceptuales –todas ellas dentro de la *nueva filosofía* de la flexibilidad, volvemos a insistir– del socialismo español, en consonancia con su propuesta estrategia de su proyecto de

²⁰¹ Véase al respecto de la definición y evolución de una posición propia con respecto a la *política de empleo socialista* en el apartado “10.2.3. Crisis y agonía final del *non nato* Acuerdo Interconfederal de 1984: el extraño caso del «proceso de hibernación parlamentaria» de la reforma del Estatuto de los Trabajadores (diciembre 1983-febrero 1984)”.

²⁰² “12.4. El «gran salto adelante». El desarrollo legislativo de la RET'84: examen de las bases político-institucionales y de los mecanismos jurídicos de la formación histórica de la «cultura empresarial de la precariedad»”.

modernización económica. A saber, mejorar las condiciones de la inversión privada y eliminar las rigideces consabidas. En el primer párrafo se afirmarían literalmente:

«Con la finalidad de permitir una mejor adaptación de las plantillas de las empresas a las circunstancias cambiantes de la demanda y a las continuas modificaciones de carácter técnico y organizativo que tienen lugar en el sistema productivo, es preciso diseñar con claridad el marco institucional en materia de contratación desde una perspectiva de expansión futura de la actividad económica. Hay que impedir que la necesaria generación de puestos de trabajo, a que las nuevas circunstancias económicas han de conducir, se vea entorpecida por un marco institucional que, fundado en presupuestos y bases económico-sociales que no están vigentes, puedan conducir a resultados no deseables desde el punto de vista de creación de empleo y de la propia eficiencia del sistema productivo».

Para la continuación realizar toda una declaración de intenciones pro-flexibilización:

«[P]or otra parte, una regulación en materia de contratación demasiado rígida y alejada de la realidad puede dar lugar a numerosas situaciones de desprotección, difíciles de detectar y eliminar. Una legislación más flexible y realista permitiría, en cambio, una mejora efectiva de las condiciones de trabajo de numerosos colectivos de trabajadores, no sólo porque facilitaría la adaptación de las empresas a los cambios del entorno económico, sino porque, además, posibilitaría un mejor ajuste entre las condiciones de demanda y las características de la oferta de trabajo».

De este modo, resultaba a todas luces imprescindible dotar al marco legislativo de mayor “claridad y estabilidad”. Y para ello había que terminar con los no pocos obstáculos visibles e invisibles:

«Las modificaciones de la normativa legal de contratación se dirigirán a remover las trabas existentes para la contratación temporal de trabajadores desempleados que, en última instancia, desincentivan y obstaculizan la generación de nuevos empleos. Para ello será preciso clarificar los diferentes supuestos de contratación temporal y posibilitar su utilización en aquellos casos en que así lo precise el aumento de la actividad de la empresa o su adaptación a las fluctuantes circunstancias del mercado».

En las anteriores líneas está definido el nodo central de la propia RET’84. A sumar a lo siguiente, por si faltaban dudas de los objetivos perseguidos por Trabajo:

«Con ello se pretende eliminar restricciones para la contratación temporal de manera que las empresas puedan satisfacer sus necesidades temporales de mano de obra, así como hacer frente a nuevas actividades empresariales sin asumir riesgos adicionales que en determinadas circunstancias desincentivan la contratación de nuevos trabajadores».

Realizada tan presentación de *intenciones*, se delineaban las líneas maestras de las principales figuras a revisar. Más allá de los datos estadísticos allí apuntados, en relación a la nueva modalidad de contratación temporal se fijaban como principales características las siguientes:

«Los contratos efectuados según esta modalidad tendrán una duración mínima de seis meses y máxima de 3 años, pudiéndose, cuando se concierten por un plazo inferior a los 3 años, prorrogarse hasta dicho máximo».

Por tanto, se procedía a una ampliación del tiempo de su utilización. Ahora bien, se ha de destacar un hecho aquí trascendental. Tanto en la *Exposición de Motivos* como en el artículo 15 y en el artículo 17.3 de la Ley 32/1984, desaparecería el límite inferior, dejándose tan sólo constatado el tiempo máximo. ¿Por qué? A día, y con la documentación que se ha podido consultar, no se puede ofrecer una respuesta. Una respuesta que podría, a buen seguro, localizarse a través de las negociaciones no públicas entre la UGT y Trabajo –que comentaremos en las siguientes páginas– cuyos resultados y contenidos se siguen desconociendo de forma casi absoluta.

Sabiendo desde Trabajo, por lo demás, de lo problemático de esta figura y de las esperadas resistencias frente a las tesis de las principales centrales sindicales, se establecerían toda una serie de “cautelos”, en forma de “requisitos que impidan una utilización de la misma

inadecuada y abusiva”, y que, en cualquier caso, no suponían mayores novedades cuando se revisa la anterior legislación. No obstante, se incluía una cuestión fundamental que también desaparecería en el proyecto aprobado y negociado entre Trabajo y UGT tras su publicación en el BOE. Una *desaparición* que modificaría de forma total el *sentido* de la RET’84. Pues, en el borrador primitivo se plantearía la necesidad de evidenciar la causa temporal por parte del empleador. Así se podía leer:

«[...] Igualmente, y para evitar que las contrataciones temporales se hagan para fines diferentes a los previstos en la regulación legal, deberá establecerse en los contratos de carácter temporal el supuesto o causa en que se fundamenta la contratación, en cualquier caso, y la duración de dicha contratación siempre que ello sea posible. Cuando la duración de la contratación no pueda establecerse previamente deberá fijarse el hecho o acontecimiento que da lugar a la terminación del contrato: realización de obra o servicio, finalización de tarea, reincorporación del trabajador sustituido, etc.».

Por último, el borrador de Trabajo ya previa una “compensación económica, de naturaleza semejante a las indemnizaciones por despido aunque de cuantía inferior”.

Además de la larga parte dedicada a la reforma global de la contratación a tiempo parcial —es decir, del artículo 12 del ET’80— en relación, ahora, a las medidas de fomento del empleo, se continuaría con la misma lógica descrita: ampliar al máximo, sabiendo de la entonces actual correlación de fuerzas así como de la propia realidad laboral.

«Además de las modificaciones señaladas en el epígrafe anterior en las modalidades de contratación temporal y a tiempo parcial, con la finalidad de eliminar las trabas existentes a la contratación de nuevos trabajadores se establecerán programas y medidas destinados a fomentar de manera especial el empleo de aquellos colectivos de trabajadores más desfavorecidos por la situación de desempleo y peor situados en relación a su inserción en el mercado de trabajo».

Colectivos que venían a ser los mismos que en la legislación anterior: jóvenes, mayores de 45 años y mujeres. No se ahorrarían, por cierto, ciertas críticas contra la legislación previa: “De la importancia de estas medidas de fomento del empleo [...] cabe deducir que su capacidad generadora de empleo ha sido escasa, especialmente de las dirigidas de forma específica a los jóvenes desempleados, contractos en prácticas y para la formación”.

Bajo el no cuestionable argumento de la “acentuar la eficacia de las medidas de fomento del empleo”, se plantearía la irremediable necesidad de eliminar “las trabas burocráticas e incertidumbres que actualmente obstaculizan su utilización”. Por aquí, como puede comprobarse tras tantas páginas dedicadas al asunto, la capacidad de inventiva legislativa de los socialistas sería bastante menor. Lo único cierto es que volvía ser “preciso simplificar, clarificar y difundir la nueva normativa”. A lo anterior, en todo caso, ha de reseñarse también la voluntad del legislador de superar la fase de inconcreción de una política de empleo juvenil, y avanzar en ese sentido, cuando afirmar como entre los objetivos de la futura reforma se encontraban los siguientes:

«Manteniendo su carácter temporal, se modificará la actual normativa, con el fin que se conviertan en auténticos programas de fomento del empleo de jóvenes desempleados, posibilitando y favoreciendo su integración en el proceso productivo, así como mejorando sus [sic] cualificaciones profesionales y permitiendo, en su caso, su formación y reconversión profesionales».

Las tres vías seleccionadas para la inserción del colectivo de jóvenes, sin embargo, no depararían mayores novedades legislativas, en tanto se trataba, a lo suma, de reformar y ampliar las existentes. En el contrato en prácticas, se esbozaría como “sólo podrán ser contratos los jóvenes que estén en posesión de título universitario o de Formación Profesional de 2º y 3º Gr”. Lo que reducía, en un primer momento, los *potenciales beneficiarios* establecidos en la normativa anterior. No obstante, y a pesar de que sea adelantar acontecimientos, la redacción del artículo 11 de la Ley 32/1984 terminaría asemejándose bastante al del ET’80. Lo que sí suponía un paso para adelante era la ampliación de hasta “los cuatros años inmediatamente anteriores” en relación a la finalización de los estudios para contratar bajo esta vía frente a los 2 años establecidos en la legislación previa. En relación a los contratos para la formación, se

rebajaría la edad desde los 18 a los 16 años, y se ampliaría también por arriba desde los 18 a los 20 años, incrementándose también la duración de los posibles contratos de 2 a 3 meses y estableciéndose un mínimo de 3 meses. Un límite no existente en la anterior legislación.

Hasta aquí llegarían las principales modificaciones y novedades. Pero como se ha insistido, ante todo se estaba ante la consumación de la transición político-laboral de los socialistas españoles, en su adopción progresiva de la *lógica de la flexibilidad laboral*. Una peculiar “transición” que no concluiría ahí ni lograría satisfacer las pretensiones iniciales de Economía y Trabajo. O dicho de otra forma, aquel documento venía a ser un nuevo ejemplo de materialismo político por parte de los socialistas, a la hora de *tantear* los límites de ciertas fronteras del Derecho del Trabajo teniendo presente una determinada correlación de fuerza capital-trabajo, que les impedía *de facto* ir más allá.

A renglón seguido de entregarse la documentación oportuna, y cuando los principales interesados apenas había tenido tiempo para su análisis y valoración –aunque en el caso de UGT, esto no fuera así– se iniciaría una feroz campaña de descredito y acoso a las propias Comisiones Obreras por parte del Gobierno, con Felipe González y Carlos Solchaga en primera fila. La estrategia del *divides y vencerás* se ponía en marcha en un formato un tanto primitivo y tosco, pero útil para sus propósitos.

El momento elegido no era casual. A unos días de que se abriera la última etapa de la negociación de la reforma del mercado de trabajo –que en lo básico transcurría entre el 4 al 18/19 de noviembre, mediante sólo seis reuniones oficiales/públicas, hasta la aprobación de los diferentes proyectos de ley en un Consejo de Ministros el día 30 del mismo mes– la *demonización* del sindicato comunista tendría la virtud de introducir una cuña más entre UGT y CCOO, evitando una muy remota posible unidad de acción frente a las reformas pendientes. El tradicional distanciamiento, primero, y posteriormente, enfrentamiento entre Comisiones Obreras y el Gobierno no era nada nuevo. Venía agravándose día a día, especialmente desde que se conociera con detalle la línea de actuación económica del Ejecutivo.

La mecha que encendería este nuevo choque entre el Gobierno y los comunistas, serían dos hechos aislados pero con profundas ramificaciones interconectadas. Nos movemos entre el 8 al 10 de noviembre. O dicho de otra forma, entre la primera y la segunda reunión del proceso negociador que tendría lugar el 4 y 11 de noviembre. En primer lugar, Carlos Solchaga, Ministro de Industria, expulsaría al Secretario General de la poderosísima Federación del Metal de CCOO de las conversaciones para la reconversión industrial. En un gesto de prepotencia y chulería, que caracterizarían para la posterioridad al propio Solchaga, este no permitiría la entrada a Juan Ignacio Marín a las negociaciones, bajo dos poderosos argumentos: su encierro en la sede del Ministerio de Industria y las fuertes movilizaciones comandadas por CCOO, en lo que se conoció la *marcha a Madrid* de los trabajadores de Sagunto, junto con la posterior manifestación enfrente del Ministerio²⁰³. Una presión, a juicio del titular de Industria, intolerable. Detalles escabrosos aparte que nada o poco pueden llegar aportar, no sólo pediría que CCOO sustituyera al representante del Metal sino que también tendría el atrevimiento de que el representante sindical pidiera disculpas públicas²⁰⁴. Para el PSOE, no cabía duda alguna: “Comisiones pone en peligro la concertación”²⁰⁵.

²⁰³ Véase la *nota 155*.

²⁰⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “Solchaga ratifica la exclusión de CCOO de la concertación hasta que la central no retire a Marín o se disculpe en público”, *El País*, 9 de noviembre de 1983.

²⁰⁵ Esas serían las palabras empleadas en el titular correspondiente de *El Socialista* para justificar la actitud de Solchaga. Por cierto, la habitual redactora de laboral de ese mismo medio de comunicación, en un *desliz* haría una extraña como no explicada mezcla entre el nombre de Agustín Moreno y de Juan Ignacio Marín, al hablar del agente del «incidente provocado»: Agustín Marín. En cualquier caso, un mensaje optimista al respecto se podría leer en boca de José Luis Corcuera: «[N]o hay peligro de ruptura de la concertación, pero lo que pone en peligro es la doble estrategia que presenta Comisiones Obreras

Por su parte, Felipe González ayudaría a caldear el ambiente tras unas declaraciones realizadas en Viena en la que nada veladamente acusaba a CCOO de irresponsabilidad social, política, económica... Tras un canto a la *Paz Social*, vendría a señalar como si durante los meses de septiembre y octubre, “se hubieran atendido los requerimientos de huelga de algunos líderes sindicales irresponsables, en sectores como el ferrocarril, etcétera, la economía española estaría arruinada. Afortunadamente, las gentes son más responsables”, sentenciaría en aquella ocasión²⁰⁶.

Siempre prestos a sumarse a tales labores, UGT pondría mucho de su parte al tildar, por boca de Antonio Puerta –Secretario General de la Federación del Metal– de *deshonestos, desvergonzados y estalinistas* a CCOO al calor de estas mismas batallas²⁰⁷. Un cruce de acusaciones y difamaciones que, por cierto, le sería enormemente útil a la propia UGT a la hora de legitimar, a nivel interno y externo, su firma en los acuerdos laborales con el Gobierno, una vez que la propia actitud de CCOO había hecho saltar por los aires, según su versión, la posibilidad de llegar a una posible plataforma reivindicativa.

No terminaba ahí el asunto, ya que la estrategia de UGT –quien parecía jugarse todo a la par que confundía *deseo* con *realidad* en su búsqueda de la hegemonía sindical– iba mucho más allá, como se reflejaría en una crónica de Rodolfo Serrano. En la misma se dejaba *caer* –con el beneplácito filtrador procedente, a buen seguro, de las oficinas la calle San Bernardo, nº 20, de Madrid– que dadas las circunstancias y la radicalización de posturas de CCOO, la UGT se mostraba dispuesta a abrir sus puertas a los militantes y cuadros de CCOO desencantados con la estrategia del sindicato. Uno de los primeros intentos de *desangrar* al sindicato de mayoría comunista –también a través de una estrategia un tanto primitiva como tosca como repleta de miserias políticas y sin posibilidades de éxito– que se repetiría en los siguientes meses. Pero volviendo, ahora a lo importante, para que tal posibilidad ocurriera, deberían darse una serie de condiciones:

«Para ello, previamente, debía producirse un acercamiento de posturas que demostrara a los sectores más moderados de CCOO la afinidad de posiciones. En una segunda fase se haría un llamamiento formal a la integración que, en los cálculos de UGT, desmembraría al otro sindicato, dejándole reducido al ala más radical y convirtiéndole en una central testimonial»²⁰⁸.

promoviendo movilizaciones en la calle, mientras, por otra parte, desarrolla una concertación en los Ministerios». PADILLA, Sol, “Comisiones pone en peligro la concertación”, *El Socialista*, nº 335, (1983), p. 32.

²⁰⁶ Noticia, Juan Roldán, “Felipe González califica de irresponsables a los dirigentes sindicales españoles que abusan de llamamientos a la huelga”, *El País*, 9 de noviembre de 1983. O, Noticia, Félix Monteiro, “CCOO rechaza la calificación de irresponsabilidad sindical hecha por Felipe González y acusa al Gobierno de parcialidad”, *El País*, 10 de noviembre de 1983.

²⁰⁷ Noticia, “UGT acusa de desvergüenza y estalinismo a CCOO”, *El País*, 11 de noviembre de 1983. Días más tarde, el destacado dirigentes de CCOO, Julián Ariza, señalaría en las mismas páginas del citado medio lo siguiente: «Lo primero que salta a la vista es que, para el Gobierno, la concertación social no está concebida como una búsqueda de *apoyo de los sindicatos para vencer la resistencia de la derecha económica y política a los cambios estructurales que se necesitan para dar a la crisis una superación progresiva*. Lo que pretende el Gobierno es que los sindicatos paguen su participación en la concertación, implicándose en la política económica que quiere llevar a la práctica». Y matizando a continuación: «A cambio, les daría la posibilidad de hacer retoques sobre aspectos parciales, poco relevantes respecto de su globalidad. El Gobierno quisiera que los sindicatos sirvieran de colchón amortiguador del descontento popular, dado el coste social de dicha política». ARIZA, Julián, “Las razones de un veto”, *El País*, 16 de noviembre de 1983 [*cursiva* en el texto original].

²⁰⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “El conflicto entre el ministro de Industria y CCOO ha abortado un intento de unidad sindical propiciado por UGT”, *El País*, 13 de noviembre de 1983. Como destacaría tiempo después Antonio Gutiérrez: «La UGT ha estado desde finales del 83 o sea, desde que se produce esa sustitución del programa electoral del PSOE por la [...] económica real hasta el mismo 1986 con una concepción muy instrumental de la política económica creyendo que era el árbol que le podía dar más sombra en el movimiento sindical [...] es decir sigue siendo un comportamiento absolutamente mediatizado por la pugna por la hegemonía sindical. Yo no creo que la UGT haya sido plenamente

En este ambiente tenso y cuando las distancias entre las partes parecían en muchas ocasiones insalvables, en apenas una semana –la que va del jueves 10 de noviembre al viernes 18 de noviembre– se obraría el “milagro” del acuerdo de la RET’84. El empleo del concepto *milagro* quizás no resulte el más adecuado en términos laicos propios de cualquier investigación histórica que así se precie, pero observando cómo habían transcurrido todo este proceso negociador, desde que se iniciará en mayo con las primeras declaraciones hasta el mismo mes de noviembre cuando se entregaría el primer borrador; que se cerrara entre el Gobierno y la UGT un acuerdo de tales dimensiones en muy pocos días y horas, obedecía, sin duda, no a *designios superiores* sino a una operación de ingeniería política de primer orden. Una *operación* en donde se ahorrarian tensos y dramáticos momentos anteriores como en el caso del ANE o del AI’83, sin más lejos. Pero sobre todo se ahorrarian decenas de horas a través de largas reuniones que terminaban a altas horas de la madrugada. De hecho, el proceso negociador con el que se llegaría a acordarse el principio de acuerdo sobre la RET’84, sería, en apariencia el más corto del “modelo español de concertación social”: no más de cinco reuniones entre Gobierno y sindicatos, más un par de reuniones con la CEOE. Más efectividad, dados los precedentes, no se podía pedir.

De esta forma, a partir de aquel jueves 10 daba inicio el gran *teatro de la política* con una cuidada puesta en escena: reuniones, declaraciones, desencuentros, controversias... De conocerse hasta el último detalle de las reuniones entonces celebradas –con nombres y apellidos, lugares y otros tantos datos...– se asistiría a un cierto *apagón informativo*, hasta que la firma de un principio de acuerdo devolviera a la negociación su lustre mediática. Un *apagón informativo* también aquí bastante relativo, teniendo presente lo que sucedería un año después, cuando se impusiera un férreo pacto de silencio.

Por este camino, a la discreción con la que se solían llevar este tipo de negociaciones, se sumaría reuniones secretas y acuerdos bajo cuerda para el inmediato futuro. Ciertamente pocos datos y detalles conocemos a día de hoy de cómo se obraría el citado “milagro”, en donde a la postre la UGT cedería numerosas parcelas políticas y estrategias en su intento de mejorar la reforma en marcha, y, sobre todo, en que no se viniera abajo toda su estrategia programática saliente de su último Congreso Confederal. Enarbolada la bandera de la responsabilidad y de la solidaridad –y una vez *salvados los muebles*, en uso de coloquial expresión– por parte de los ugestistas en los momentos posteriores se conocerían las numerosas contrapartidas obtenidas, a la par que se acentuarían las críticas a CCOO una vez rotos todos los puentes de un posible entendimiento.

La puesta en escena de la negociación tendría lugar el 11 de noviembre de 1983. Fecha de la segunda reunión. Se iniciaba el *tira* y el *afloja* en público, en los medios. Consumados negociadores–José Luis Corcuera por parte de UGT y Agustín Moreno por parte de CCOO, ambos secretarios de Acción Sindical, respectivamente– encabezarían las delegaciones sindicales que se reunirían con el Ministro de Trabajo y su equipo –capitaneado, por entre otros, por Álvaro Espina (Secretario General Técnico) y Segismundo Crespo (Subsecretario de Trabajo) principal *vocero* del Ministro– de cara a hablar sobre el documento entregado una semana antes.

En una teórica igualdad de condiciones entre los allí implicados, daba comienzo una semana de reuniones y de más reuniones. A falta de actas de las mismos encuentros –que a día de hoy se desconocen si existen o no– el rastro de aquellas conversaciones tan sólo se ha podido seguir, y muy parcialmente, a través de la prensa y de forma todavía más fragmentada por la documentación sindical.

consciente de qué tipo de política económica estaba avalando durante estos años porque no veía más allá de la pugna contra CCOO y de recuperar y tener en exclusiva para la UGT el papel hegemónico en el movimiento sindical. Es una estrategia encaminada a convertirse, no ya en sindicato hegemónico, sino a convertirse en la única central sindical del país». Extraído de, OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 166 nota 64.

Así pues, durante la primera segunda reunión pública el viernes 11 de noviembre –tras el primer encuentro formal del día 4– ninguna de las partes cedería posiciones a lo largo de las tres horas que duraría el citado encuentro²⁰⁹. Si para CCOO en ningún caso era negociable una posible ampliación de la contratación temporal, dados sus pésimos resultados y los riesgos previsibles; por parte de la UGT se centrarían todas las energías en seguir manteniendo el *carácter excepcional* de la contratación temporal, como si con tal posición se pudiera, en su caso, evitar la extensión de la flexibilización. Con posibles acuerdos más avanzados –cobertura por protección por desempleo, medidas de fomento del empleo y otros asuntos– a nivel técnico-jurídico otro de los debates que encallarían las negociaciones sería la no conveniencia de modificar el ET por parte de los sindicatos de clase²¹⁰. El inicio fue, pues, como se esperaba: sin acuerdo y con cada una de las partes marcando las distancias oportunas. No obstante, no se puede obviar la doble intención de las declaraciones de Almunia al concluir dicho encuentro, en donde dejaba abierta una puerta a CCOO:

«mientras que UGT ha mostrado una actitud susceptible de ser negociada respecto a la reforma del mercado de trabajo, CCOO tiene discrepancias que se alejan bastante de nuestra propuesta. El Gobierno considera que ante una situación excepcionalmente mala en la contratación temporal, hay que tomar medidas excepcionales que no se pueden limitar en el tiempo, ya que el paro no va a desaparecer de la noche a la mañana y va a durar aún muchos años. Por tanto pensamos que sería un error limitar la contratación temporal a unos cuantos años»²¹¹.

La tercera segunda reunión pública tendría lugar el lunes 14 de noviembre. Encuentro precedido por unas contundentes declaraciones –repletas asimismo de unas no disimuladas amenazas– de Joaquín Almunia, en torno a los *riesgos* de superar durante la negociación colectiva las *bandas* previstas por el Gobierno. Pero volviendo a los resultados de la tercera reunión, en la misma se hablaría largo y tendido del otro eje de la reforma del mercado de trabajo: la futura *Ley de Protección por Desempleo*, con la que el Gobierno en parte pretendía atenuar los posibles efectos negativos de la extensión de la temporalidad –es decir, los casi seguros costes de la sustitución de fijos por temporales mediante masivos despidos– a la par que *ofrecer* una cierta compensación político-social a los sindicatos por la extensión de tales figuras contractuales, de cara a sus afiliados y al conjunto de los asalariados. No era menor, en ningún caso, esta *pata* de la reforma del mercado de trabajo. *Promesas y buenas intenciones* no faltarían tan poco en este campo esencial de las políticas sociales de los estados del Bienestar.

Transcurridos tres años desde la aprobación de la LBE no sólo había descendido radicalmente la tasa de cobertura de los desempleados, sino también el conjunto de las prestaciones contributivas y no contributivas²¹². Ahora bien, aquí como sucedería con la propuesta de los 800.000 puestos de empleo, la *promesa* más repetida a partir de ese instante sería alcanzar el 44% de la tasa de cobertura –que para dichos año se hallaba entre el 22% al 24%–. Un incremento que implicaba un fuerte gasto social cuando las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social no pasaban por momentos boyantes, y se estaba en una fase de penetración de la ideología (neo)liberal, que comenzaba a cuestionar todo el concepto de lo *público*. Tanto CCOO como UGT apostarían, lógicamente, por aumentar tal tasa de cobertura, junto con la

²⁰⁹ También el día 11 Almunia se reuniría con José María Figueras presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. En el citado encuentro, Figueras mostraría sus «más urgentes preocupaciones de las Cámaras sobre la [reforma de la] Seguridad Social y la legislación laboral que se prepara», para a continuación solicitarle, sin tapujos, que apostara por el despido libre. Noticia, “El marco legal de la contratación temporal enfrenta a Administración y sindicatos”, *ABC*, 12 de noviembre de 1983. Véase aquí al respecto, Editorial, “El despido libre”, *La Vanguardia*, 15 de noviembre de 1983.

²¹⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “La contratación temporal centra las diferencias en la concertación”, *El País*, 12 de noviembre de 1983.

²¹¹ Noticia, “La contratación temporal, grave escollo para la concertación entre Trabajo y sindicatos”, *La Vanguardia*, 12 de noviembre de 1983.

²¹² Véase la *nota 125*.

extensión de un subsidio indefinido para los parados de mayores de 55 años. Matices sobre criterios y de gasto aparte, en dicha reunión ya se advertirían las amplias diferencias entre Gobierno y CCOO y que parecían “insalvables”. UGT en otro ejemplo de acercamiento a la “unidad de acción” también aportaba su *granito de arena*: “Si se ponen los listones tan altos, es imposible” en relación a las propuestas de CCOO sobre la reforma de la LBE.

Ahora bien, la escenificación pública y política –o si se prefiere la “teatralización mediática”²¹³– del futuro acuerdo para las futuras Ley 31/1984 y la Ley 32/1984 iba cobrando forma, mientras que detrás del escenario se negociaba los detalles no menores de los propios acuerdos. No pocas coincidencias y pormenores de los citados encuentros parecían indicarlo, como no se cansaría en denunciar los portavoces de CCOO: “A veces tengo la sensación de que estamos de comparsas y que, digamos lo que digamos, jamás llevaremos razón”²¹⁴. El peso de la experiencia jugaba aquí un papel determinante.

Un día después, el martes 15 de noviembre, entraba en escena la CEOE. *Insaciable* se mostraría pese a que en materia de contratación temporal se habían aceptado de antemano no pocas de sus reivindicaciones históricas. De hecho, en la prensa no se dejaría de resaltar como “las posturas de la patronal y Gobierno no difieren demasiado” en el tema de la flexibilización del mercado de trabajo²¹⁵. En un contexto de evidente cambio de correlación de fuerzas a su favor, lanzaría su *ofensiva* para contrarrestar lo que consideraría prácticamente como una *ofensa* a título gremial. A saber, la modificación del artículo 56.4 del ET, a través de donde los gobiernos de la UCD –en uno de sus conocidos “regalos empresariales”– habían planteado una vía por la cual en los despidos declarados improcedentes –la mayoría– en empresas con menos de 25 trabajadores, la indemnización final a abonar por los patronos se rebajaba considerablemente pagando el FOGASA el 40%. Un reiterado *abuso* de las arcas públicas que ni la CEOE podía defender en público.

Con la presentación de un documento con las posturas de la patronal –siempre tan predisuelta, llegada la ocasión, a expresar su reservada opinión *papel en mano*– introduciría en el debate público un programa de máximos y de mínimos. De *máximos* cuando se pronunciaba a favor de un despido libre en las empresas con menos de 25 trabajadores, en compensación por la modificación del citado artículo 56.4 del ET; y de *mínimos*, y con no poco ahincó, cuando sacaría a relucir su posición de fuerza en torno a los ERE en base a una disposición dictada por el Consejo de las Comunidades Europeas. Una disposición que daría mucho que hablar y sobre que se fundamentarían no pocas esperanzas por parte de la derecha económica y política del país, de cara a conseguir el *despido libre* en el mercado de trabajo, y que, de hecho, centraría gran parte del posterior debate en el futuro AES. Se introducía, en todo caso, un nuevo tema en la agenda de la concertación social²¹⁶.

“Queremos resolver la crisis, el escandaloso estancamiento, desánimo y paralización. Creemos que es posible conseguir más alegría y confianza. No cuarteemos las posibilidades. Nuestro programa es optimista, constructivo”. Con este no disimulado entusiasmo Carlos Ferrer Salat, reforzaba la ofensiva de la CEOE al día siguiente tanto de cara a la negociación salarial como en relación a la concertación social. Tocaba, por tanto, *apretar* más tanto al Gobierno

²¹³ OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 189.

²¹⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “Almunia afirma que el Gobierno endurecerá su política si los salarios crecen más del 6,5%”, *El País*, 15 de noviembre de 1983.

²¹⁵ En cambio desde el *ABC* se profundizaría en esta misma cuestión, destacando como la posición de la patronal, más allá del despido libre, iba un paso más allá en materia de contratación: «Habría que establecer la contratación temporal como forma ordinaria de contratación, y así se seguirá la pauta de otros muchos países. A tal efecto, habría que revisar en profundidad y dar estabilidad a la normativa aplicable, sujeta a incesantes cambios en los últimos años». Noticia, “Los empresarios piden de modo oficial al Gobierno el despido libre”, *ABC*, 16 de noviembre de 1983.

²¹⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “Trabajo rechaza la propuesta de despido libre en las pequeñas empresas presentada por la CEOE”, *El País*, 16 de noviembre de 1983.

como a los sindicatos, siendo conscientes de su profunda división. De este modo, en una rueda de prensa, presentaba cuatro documentos “alternativos” acerca del PEMP, de los Presupuestos Generales, del proyecto de reindustrialización y de la reforma del mercado de trabajo. La maquinaria documentalista-propagandística de la patronal volvía a funcionar a la perfección.

En realidad, en menos de un año la CEOE observaría como parte de su programa había sido asumido de forma natural y sin grandes traumas aparentes por los socialistas. Con escasos roces entre Gobierno y patronal, con no pocos halagos de por medio, en aquella ocasión se criticaría muy suavemente la política económica del Gobierno. Sabiendo lo decisivo de lo se negociaba, tanto en público como en privado, puestos a pedir, por ejemplo, no les parecía suficiente la banda salarial del 6,5% de los socialistas, a la que sin estimar alejada de sus propuestas, pensaban que no dejaba de ser generosa. Sin batallas políticas significativas de por medio, afinarían su diatriba contra el excesivo gasto público. Así José María Cuevas declararía que había “cuatro billones de pesetas donde entrar con un chuchillo bien afilado”. El que, en breve, se convertiría en el nuevo presidente de la CEOE, también señalaría como en dicha coyuntura no veía un posible acuerdo cercano en torno a la RET’84 y que, a lo sumo, “toda la operación puede terminar en un decreto regulando la contratación temporal”²¹⁷.

En dicho escenario cuanto menos quedaban dos cuestiones bien claras. A la hora de la verdad, tal y como sabría captar perfectamente un editorial del *ABC*, el Gobierno optaría por cierta prudencia en la presentación de sus propuestas. Así pues Trabajo, en un primer instante, parecía haber ganado la batalla política frente a Economía en un gesto de evidente pragmatismo. De hecho, así lo veía el periódico conservador, aunque añadiendo como desde el Gobierno se seguía maniatando la verdadera esencia del mercado libre:

«Ante las exigencias en contrario impuestas por las centrales, el Gobierno ha adoptado, por lo que incorrectamente se podría entender como término medio, descartar el despido libre y generalizar la contratación temporal. Eso, díganse las cosas por su nombre, no es término medio. El término medio y la equidistancia sólo podría venir del reajuste de los puntos de partida; es decir, desde el pacto o el arbitraje entre el principio general de inamovilidad de las plantillas y el principio que consagra la cristalizada inamovilidad de la prepotencia sindical»²¹⁸.

Junto al consabido pragmatismo de los técnicos y políticos socialistas, venía a sumarse la segunda evidencia en palabras del cronista laboral de *La Vanguardia* Mariano Guindal, tras la tercer reunión en donde no asistiría el Ministro de Trabajo: “En resumen, se puede afirmar que la negociación aún no ha comenzado, ya que no se ha pasado de los planteamientos generales, ni de las cuantificaciones de las propuestas que hace cada parte”²¹⁹. Si miramos al pasado más reciente acerca de cómo y por dónde habían transcurrido el AMI, el ANE, el AI’83 hasta aquí parecía que el guión previsto más o menos se iba cumpliendo. Ahora bien, lo que sucedería en los días siguientes sería una *ruptura* casi radical de lo previsto y de lo previsible en estos casos.

Aquí igualmente ha de destacarse como de repente y sin previo aviso, la CEC de UGT dejará de reunirse en los momentos decisorios. Tras su última reunión del 26 de octubre no se volvería a reunir hasta el 15 de noviembre. Más aún pues esta citada reunión se convertiría en la última antes del Comité Confederal extraordinario celebrado diez días después. Pero yendo ahora la citada reunión de finales de octubre, asistirían todos los miembros de la CEC, a excepción de Manuel Simón. Un encuentro que se alargaría durante cuatro horas, entre las 10.00h a las 14.00h. Si en lo referido a la reconversión industrial se afirmaría como la

²¹⁷ Noticia, “La CEOE considera que no hay posibilidad de acuerdo salarial con CCOO y pedirá subidas inferiores al 6,5”, *El País*, 17 de noviembre de 1983; Noticia, “CEOE y CEPYME presentan su plan económico a medio plazo, en el que urgen la flexibilidad laboral”, *La Vanguardia*, 17 de noviembre de 1983.

²¹⁸ Editorial “Reforma y negociación”, *ABC*, 10 de noviembre de 1983.

²¹⁹ Noticia, Mariano Guindal, “No hay acuerdo entre UGT y CCOO sobre la cobertura a desempleados”, *La Vanguardia*, 15 de noviembre de 1983.

“negociación [...] se considera avanzada y con posiciones cercanas entre la Administración y Centrales”, y tan sólo quedaba pendiente el “método a seguir para realizar los ajustes de plantilla”; otro tanto sucedía con la reforma de la LBE, en donde también se señalaba como el “acercamiento entre la Administración y UGT en los aspectos señalados es bastante notable”; y otro tanto, al parecer, sucedía con la futura RET’84 y con la futura LOLS, más allá de lo que se publicará o no en los medios de comunicación sobre diferencias sustanciales sobre la expansión de la contratación temporal.

En conjunto, la concertación parecía ir bien encaminada desde la perspectiva ugetista y sin demasiados roces con el Ejecutivo. Pero, nuevamente, el “eterno problema” de CCOO volvía a estar presente en las divagaciones de la UGT. Así Comisiones Obreras aparecía como un sindicato que está llevando “actuaciones contradictorias y desestabilizadoras que están emprendiendo con carácter general y con fines eminentemente políticos y no sindicales”. Y lo que era más grave: “ponen en peligro [tales actuaciones] la Política de Concertación que hemos intentado plasmas en estas negociaciones”. Conclusión *salomónica*: aislar a Comisiones Obreras y firmar tales proyectos sin ella, aunque manteniendo una política informativa que supiera rendir los frutos de tantos meses de cavilaciones y malos ratos:

«En consecuencia se hace necesario empezar a pensar que los posibles acuerdos a que podamos llegar en las distintas mesas de negociación sean realizados sin la firma o la presencia de CCOO.

En este sentido, se considera necesario agilizar la actual negociación en todo lo posible y estudiar los mecanismos necesarios que posibiliten en todo caso el protagonismo de nuestra Organización con este proceso de Negociación».

Antes de avanzar, sin embargo, hay un detalle no menor que no se puede obviar: ni siquiera la CEC de UGT pensaba en ese mismo momento que la recta final del proceso de concertación del *pack legislativo* laboral se fuera a resolver tan rápidamente. Y decimos lo anterior ya que entre los acuerdos aprobados en el mismo martes 15, estaría el de convocar un CC ordinario para los días 1, 2 y 3 de diciembre. Finalmente no sería así²²⁰.

En menos de 48 horas, entre los días del 17 al 18 de noviembre de 1983, se cerraría a una *velocidad de crucero* principio de acuerdo público en relación a la reforma del mercado de trabajo entre la UGT y el Gobierno. Y remarcamos, lo del *acuerdo público* por la sencilla y evidente razón de que todos y cada uno de los indicios acumulados hasta el momento –a pesar del parcial *apagón informativo* durante aquellos días– parecen indicar que mientras se negociaba en las mesas destinadas a tal fin; en paralelo y en secreto –aunque fuera un “secreto a voces”– se iría elaborando, detallando y especificando cada uno de los puntos más espinosos de la futura Ley 32/1984. Por el momento, ningún testimonio directo ha desmentido lo anterior.

Que la UGT siempre iba un paso adelante en todas y cada una de las negociaciones sobre la reforma del mercado de trabajo, la negociación salarial... y todas las cuestiones relacionadas con una concertación social además de sabido –y ahora demostrado a través de las siempre valiosas actas de la CEC de UGT– casi se daba por sentado por todos los implicados ante los estrechos vínculos estratégicos entre la familia socialista. Como hemos mantenido en más de una ocasión, a buen seguro, no se trataría de grandes conspiraciones ni de reuniones secretas al estilo de las películas norteamericanas. Probablemente aquellas reuniones entre políticos y técnicos socialistas, con miembros del Ejecutivo, del Partido y del Sindicato, ofrecerían más el aspecto de una familia en riña por detalles menores dentro de la vida cotidiana de la gestión gubernamental; todo ello antes que la clásica imagen de una habitación con escasa luz, repleta de humo y con palabras medidas y en baja voz.

Detalles aparte que no aportarían gran cosa al contenido de los acuerdos pactados, la clarificación final del escenario concluyente tampoco supondría ninguna gran novedad en el

²²⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 13. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 15 de noviembre de 1983”, sig. 002251-003. Por cierto no se tiene constancia de actas, y por tantos de reuniones de la Ejecutiva de UGT, en los siguientes días hasta el 29 de noviembre de 1983.

tablero político-sindical. Otro asunto radicalmente diferente serían las formas, tanto por cuestiones *éticas* como *estéticas*. Un aspecto no menor, en ningún caso, en un tipo de negociación como esta. Y no sólo por el carácter secreto por donde transcurrieron, casi de forma segura, desde el mes de septiembre y/o octubre las negociaciones, sino por el evidente desprecio con el que se trataría al resto de los interlocutores –CCOO y CEOE– a quienes no se les entregaría el texto definitivo de la reforma laboral hasta prácticamente 24 horas antes del acuerdo, junto con otros tantos detalles ya citados. Un doble juego en donde si los socialistas en el poder político se mostrarían siempre tan hábiles, sus compañeros sindicales no se desenvolverían, en cambio, tan duchos en tales maniobras conspiratorias.

Cuando se profundiza más allá de lo que ofrecieron los titulares de prensa de aquellos dos días y se desciende al meollo de la noticia, de la información propiamente dicha, nos encontramos con un conjunto de pistas que, a grandes rasgos, vendrían a confirmar todo lo anterior. En medio de un parcial *apagón informativo* por parte de *El País*, este anunciaba en grandes titulares el día 18 de noviembre el contenido de una carta de Marcelino Camacho a Felipe González para reconducir la concertación social. Una carta más de otras tantas que se enviarían durante años Camacho y González en una no siempre fácil relación personal-profesional. Ahora bien, lo realmente importante venía a continuación. Allí se señalaban dos cuestiones realmente relevantes: primero, que el Ministerio de Trabajo el día anterior había presentado, por fin, el proyecto articulado de la RET'84 en la mesa de empleo en lo que sería la cuarta reunión oficial; un texto, en donde tal y como había presionado la UGT, la contratación temporal se entendería como una excepción dentro de una normativa laboral en la que el contrato de trabajo general se presumiría por tiempo indefinido. Traducido en otras palabras, en el proyecto que se presentaría a los agentes sociales se habían incluido las reivindicaciones de mínimos de la UGT. En especial, la coletilla técnico-jurídica en torno a la *excepcionalidad* que, en cualquier caso, no modificaba la naturaleza liberalizadora del proyecto en relación a la contratación temporal como tendremos tiempo de ver.

Un proyecto por más que hubiera sido tamizado dadas las presiones de la central socialista, establecía una amplia carta de posibilidades en materia de contratación temporal, bien a través del artículo 15 del ET o directamente del artículo 17.3 del ET. Un proyecto, en todo caso, y como hemos visto parcialmente, en donde se establecerían, de entrada, toda una serie de reservas para evitar el uso indiscriminado y fraudulento de tales figuras. Reservas, cautelas, que serían objeto de una larga discusión durante la negociación del AES. A todo lo anterior se sumaría las parciales conquistas obtenidas por la central socialista en lo que respecta al proyecto de revisión y de reforma del Título II de la LBE. Negociada también en secreto entre la UGT y Trabajo, sin prácticamente ningún género de duda, la misma se constituiría en la más importante contrapartida, desde la óptica ugetista, tanto a nivel interno como externo. Es en este mismo terreno en donde el Ministerio de Trabajo más cedería en su proyecto de reforma del mercado de trabajo.

Volviendo ahora al meollo del trance negociador, a pesar de conocerse algunas modificaciones y recortes en relación a las primeras propuestas gubernamentales, para las CCOO tres eran los argumentos centrales para oponerse a la citada reforma: a) primero, la aparición del concepto de *nueva actividad* que tanto daría que hablar en los siguientes años, y que, a la postre, se convertiría en el “caballo de Troya” por donde las empresas haría *uso y disfrute* a su antojo de una total libertad contractual de carácter liberal; b) su desconfianza absoluta en que con la *coletilla* del carácter excepcional de la contratación temporal se pudiera evitar, en suma, su extensión generalizada por la vía de los hechos; c) y en tercer lugar, por los recelos que le producían las vías por donde había transcurrido toda la negociación. Pues como habían denunciado y denunciaría, en adelante, estaban profundamente convencidos de que todo estaba pactado y más que pactado y que su papel se ceñía al de ser meras *comparsas*. O dicho con otras palabras: se había convertido en meros “figurantes” de este capítulo de la concertación social. No le faltaban las razones.

Por ejemplo: cuando no se habían superado los primeros compases negociadores, y predominaba la atonía antes de la quinta reunión prevista para el viernes 18, se filtraría a la

prensa una reunión entre UGT y el Subsecretario del Ministerio de Trabajo, Segismundo Crespo de cara a hablar de la futura LOLS cuando esta cuestión no había sido ni siquiera tratada en las cuatro reuniones anteriores²²¹. Por más que el escándalo fuera mayúsculo, y sabiendo como desde principios de octubre desde la CEC de UGT ya se manejaba los primitivos borradores de la LOLS: entonces, llegados aquí, ¿por qué filtrar la reunión? Quizás, ¿constituía una señal del escaso interés que tenía el Ejecutivo y concretamente la UGT en llegar a un acuerdo con CCOO, tal y como se pudo aprobó en la reunión de su Ejecutiva el 15 de noviembre? Ninguna de las anteriores como sugerentes hipótesis pueden descartarse, más teniendo presente el papel que jugaría *El País* a lo largo de todo este tiempo.

La reforma del mercado de trabajo sin ser una de las noticias con mayor proyección mediática de aquellos días, sin embargo, si había ido copando en las últimas semanas un mayor interés. Un interés informativo un tanto volátil motivado por el ir y el venir de la concertación social, de las reuniones, de los desencuentros... En todo caso, para cualquier ciudadano o ciudadana informada que siguiera aquella negociación, a buen seguro, no le dejaría de sorprender mínimamente que el día 19 de noviembre *El País* publicará la siguiente noticia: “El Ministerio de Trabajo y la UGT llegan a un principio de acuerdo en las negociaciones sobre desempleo y contratación temporal”. Sobre todo cuando otros medios ni siquiera habían dado cobertura a la quinta reunión oficial –este sería el caso de *ABC* quien, curiosamente, optaría por el silencio durante las siguientes semanas sobre el citado acuerdo– o medios como *La Vanguardia* informaban como el quinto encuentro había aportado “escasas novedades y apenas fueron hallados puntos de acercamiento entre las posturas que sostienen el Ministerio de Trabajo y los sindicatos sobre contratación temporal”²²².

Sin duda aquí también *El País* iba –como el conjunto de la familia socialista²²³– un *paso por delante* en tales empresas. Al parecer, y de nuevo, en unas pocas horas todo se había arreglado. Una inusitada rapidez que no impediría, por cierto, la publicación de un extenso editorial en el mismo periódico glosando la concertación social y, por ende, la *paz social*. Y ello, a pesar de que como informaba Rodolfo Serrano –en tiempos en donde no existía ni internet ni las redes sociales– el acuerdo llegaría “en la noche de ayer” y más concretamente al “filo de la media noche”. Más aún, pues, desde *La Vanguardia* ya el domingo 20 se hablaría de cómo “la reunión, que duró once horas y termino en la madrugada del sábado”²²⁴. Así que, parecía que también pudo existir cierto interés en filtrar el principio acuerdo –no total pero sí muy avanzado– antes del cierre del periódico en cuestión, para asegurar un fin de semana relativamente tranquilo, y cerrar así posibles maniobras de las Comisiones Obreras.

Pero seguimos con la crónica de Rodolfo Serrano. “Pendiente de un último encuentro entre las partes para dar un repaso general, el acuerdo sobre empleo sería un hecho”, añadía el mismo periodista que había seguido día sí y día también los vericuetos de la citada reforma. Un acuerdo en donde la única duda, una vez descartado un posible entendimiento con CCOO, era conocer si el *pack legislativo* negociado sería asumible para la patronal.

²²¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Marcelino Camacho pide a Felipe González que convoque a sindicatos y patronal para reconducir la concertación”, *El País*, 18 de noviembre de 1983.

²²² Noticia, “Se mantienen las posturas en la mesa sectorial de empleo”, *La Vanguardia*. Al final de aquella pequeña noticia, en cualquier caso, se dejaba caer una cuestión que se adquiriría un peso fundamental: «La Administración se negó a establecer porcentajes de contratos temporales, máximos sobre la plantilla global, a poner un límite de vigencia en la nueva normativa, y a introducir cautelas que eviten que un puesto de trabajo pueda ser cubierto indefinidamente por trabajadores temporales. Precisamente UGT presentó un texto alternativo dirigido a evitar el encadenamiento de contratos temporales».

²²³ Véase, al respecto, PADILLA, Sol, “La concertación en su recta final”, *El Socialista*, n° 337, (1983), p. 30, correspondiente a la semana del 23 al 29 de noviembre de 1983.

²²⁴ Noticia, “Concertación social: acuerdo amplio entre Gobierno y UGT”, *La Vanguardia*, 20 de noviembre de 1983, a partir de un clave de la Agencia EFE.

De cualquiera de las formas en aquella ocasión, y dado el “carácter familiar” de tal proceder negociador, se ahorrarían los llantos, las encerronas y encierros y otros desagradables y habituales momentos. Probablemente también pesará en el ánimo de los negociadores que dado que se trataba de pactar un proyecto de ley antes que un Real Decreto, no había que darle mayor atención al asunto.

Más allá de algunos compromisos de mínimos arrancados a última hora por UGT en materia de protección por desempleo, y que muy lejos quedaban de las propuestas de las Comisiones Obreras; en materia de contratación temporal –como a continuación veremos– la central socialista finalmente conseguiría limar los aspectos más flexibilizadores y regresivos de la contratación temporal, desde su propia óptica. Así pues, no sólo conseguiría, en una primera fase, introducir la *coletilla* la *excepcionalidad*, sino dejar asentado las dos vías de la contratación temporal y encajar otra *coletilla* de tan escaso efectos práctico como la primera. A saber, que en el texto finalmente acordado se hablara de que tales medidas estarían vigentes “mientras que persistan las actuales circunstancias del mercado”. Igualmente, y esto es una nota a destacar, lograría, asimismo, que se tuvieran presentes algunos mecanismos para evitar la sustitución de *fijos* por *temporales*; y lo que quizás, a la postre, era más relevante tanto en términos jurídicos como económicos: una indemnización al finalizar la contratación temporal vía fomento del empleo, todavía por definir en números de días y en cuantía. Ciertamente no era poco lo obtenido en esta fase inicial de la RET’84, sobre todo teniendo en cuenta los puntos de partida por parte del Ministerio de Economía que en agosto de aquel año había propuesto avanzar hacia una reformar tendente al *despido libre*. Con todo el mismo día en que haría público el acuerdo, se conocería también como desde la perspectiva de la Comisión Ejecutiva de la UGT, todavía era pronto para realizar un balance definitivo sobre un proceso aún abierto. Eso sí, no se desaprovecharía la ocasión, según se indicaba en una nota de prensa, para atacar nuevamente a CCOO por su propuesta de reunión a alto nivel mediante la carta de Camacho a González, acusándola de corporativista e insolidaria por su *empeño* en buscar una confrontación global²²⁵. Vaya, por delante, que no se tiene constancia de reuniones de la CEC de UGT entre el 15 al 29 de noviembre, precisamente, en los días de mayor trasiego negociador.

La actuación de UGT puede leerse desde diferentes ángulos. En nuestro caso –y teniendo presente los numerosos antecedentes– desde la óptica de la central socialista se había conseguido atenuar, limar, limitar la agresividad liberal de la modificación de la contratación temporal, que pese a su negativa inicial, al final conllevaría una modificación del ET. Por otro lado, los potenciales costes adversos todavía seguían siendo asumibles a nivel interno. No sucedería así un año después. Lo que también relevaría aquel *acuerdo por arriba* con Trabajo, era la capacidad ugetista de aguante, de tenacidad, de resistencia pero a su vez de presión para no sólo romper con el Gobierno, sino para no dejarle solo con la patronal, aunque el precio a pagar fuera el recrudecimiento de una *guerra sindical* que se extendería durante los siguientes y complicados años. Lo que no se podía ocultar, de ninguna de las maneras, era que la política de solidaridad propugnada a la salida del XXXIII Congreso se había tenido que *retorcer* y *adaptar* a las circunstancias del momento.

Retomando los últimos compases de la negociación, y pese al principio de acuerdo en torno a la reforma laboral, la negociación llegaría a su fin. No sin preocupación desde las líneas de opinión de *El País* se apuntaba aquel mismo día 19 de noviembre de 1983:

«El proceso de diálogo, sin embargo, corre peligro de hacer que ese pacto [social] no llegue a existir. La cuestión nació enferma por varios motivos, y quizá el más importante de ellos haya sido un aparente y paradójico desinterés de algunos miembros del Ejecutivo por negociar el programa económico a medio plazo con los representantes de los empresarios y de los trabajadores».

Añadiendo a continuación:

²²⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Ministerio de Trabajo y UGT llegan a un principio de acuerdo en las negociaciones sobre desempleo y contratación temporal”, *El País*, 19 de noviembre de 1983.

«Prueba de ello son las declaraciones del ministro de Economía y Hacienda, quien durante el pasado verano expresó reiteradamente la voluntad del Gobierno de informar a sindicatos y empresarios sobre el plan, pero a no pactarlo».

El mismo medio de comunicación que avisaba entonces en *voz crítica* de una “posible derechización del Gobierno”, animaba a revitalizar un proceso negociador moribundo. Acompañando tales indicaciones con un mensaje final tan claro como premonitorio de lo que acontecería en los siguientes meses:

«En el otro gran tema de debate, la contratación temporal, los sindicatos pueden pensar que tienen más posibilidades de obtener algo [en relación a los Presupuestos Generales de 1984], pero de todas maneras parece muy firme la voluntad del Gobierno de flexibilizar al máximo el mercado de trabajo, con la idea de cumplir sus objetivos de empleo»²²⁶.

A partir de ahí hasta el final del aquel mes de noviembre –cierre de esta primera gran fase de negociación– no surgirían grandes novedades en torno a la RET’84. Aunque no se diera por cerrada la negociación oficialmente, e inclusive se dejará la puerta –todo ello en la sexta reunión celebrada el día 22 de noviembre con las fuerzas sindicales– abierta tanto a CCOO como a la CEOE para presentar sus propuestas e incorporarse al acuerdo final; la realidad fue que no se movió, en la práctica, ninguna coma ni ningún punto relevante de lo acordado en la madrugada del sábado anterior²²⁷.

En un gesto mayúsculo de ingenuidad política –después del anuncio del principio de acuerdo así de otras tantas evidencias de lo que Oliet Palá, con buen criterio, denominaría como una “subnegociación formalizada”²²⁸– en la reunión del Secretariado Confederal de CCOO del lunes 21 no se daría por cerrada la negociación. De esta forma, se acordaría, por un lado, de realizar un estudio más detallado sobre el *pack legislativo*, tratando de que “no se precipite la negociación”, según se recogía en el acta de la citada reunión. Confiados en ese posible margen de acción, y pendientes que desde el Gabinete Técnico Confederal se presentaran los correspondientes informes, se limitarían los allí reunidos a examinar el contenido de la futura LOLS –a partir de uno de los primeros borradores que empezarían a circular en esos días– dejándose para más adelante los relativos a la contratación temporal²²⁹. CCOO, sin duda, iba un paso atrás.

Mientras que se conocía por la prensa los vericuetos por donde había transcurrido el método negociador, así como los alcances de las propias reformas, sumado a las contrapartidas obtenidas por la UGT; desde la propia central socialista se redoblarían los ataques en esos mismos días contra Comisiones Obreras, a quien se la trataría de culpabilizar de la falta de un *concertación social* “plena”. Una táctica tantas veces expuesta con el fin de desviar la atención de lo relevante, de lo pactado. El mismo lunes 21 Redondo afirmaría: “¿Hasta dónde va a llegar la locura, hasta dónde va a llegar la estupidez de esta gente, [CCOO], que está haciendo más movilizaciones en estos meses que durante todos los años de Gobiernos de derecha, que amenaza permanentemente con ocupaciones de fincas, líneas férreas, etcétera?”²³⁰. Una frase que contenía una indudable intención peyorativa, cargada de falsedades, pero que tendría un indudable éxito en los siguientes meses, hasta llegar a ser reproducida, casi milimétricamente,

²²⁶ Editorial, “El consenso social, el Gobierno y los sindicatos”, *El País*, 19 de noviembre de 1983.

²²⁷ En concreto, tras la sexta reunión desde ABC se afirmaría al día siguiente: «A última hora se acordó celebrar nuevos encuentros ante la definitiva aprobación de los textos legales, que se hará en el Consejo de Ministros del próximo día 30». Noticia, Amancio Fernández, “No habrá elecciones sindicales hasta 1986, según la propuesta de UGT asumida por Trabajo”, *ABC*, 23 de noviembre de 1983.

²²⁸ OLIVET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, *op.cit.*, p. 160.

²²⁹ AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 21-XI-1983”, sig. 004-024. De hecho, en el *expediente de reunión*, figuraba un informe fechado en noviembre sobre la LOLS y concretamente sobre los artículos 62, 63, 67, 71 y 72 del ET.

²³⁰ Noticia, “Duros ataques de Nicolás Redondo a CCOO ante cuadros de UGT”, *El País*, 21 de noviembre de 1983.

por el Presidente del Gobierno. De lo que no cabía prácticamente duda era del nerviosismo por el que atravesaba la UGT ante la necesidad de explicar pero sobre todo justificar las nuevas cesiones realizadas en aspectos sensibles como la contratación temporal.

Así tras el acuerdo de la madrugada del 18 al 19 de noviembre, los días posteriores serían complicados para el sindicato socialista. El 21 lunes Redondo y Saracibar en nombre de la Comisión Ejecutiva y de la Secretaria de Organización enviaban una circular convocando un Comité Confederal extraordinario para el siguiente jueves con un solo punto previsto en el orden del día: “Política de concertación y Negociación Colectiva”. Un punto, por cierto, bastante amplio pues además del *pack legislativo* laboral, el proceso de reconversión y reindustrialización, también estaba pendiente fijar las posturas de cara a la negociación colectiva de 1984. Y en donde también se podía leer: “Debido a la importancia del tema a tratar, es totalmente indispensable la asistencia a ésta reunión de todos los miembros del Comité Confederal”²³¹.

Probablemente, durante aquellos mismos días de espera a la celebración del CC, se redactaría un documento interno, a modo de memorándum y de guión explicativo, por parte de la Secretaria de Acción institucional, que titulado “Aspectos fundamentales del principio de acuerdo con el Ministerio de Trabajo”, venía a justificar las causas y los porqués de las bases del acuerdo.

Junto con el análisis realizado previamente en torno al documento *Reforma del mercado de trabajo, fomento del empleo y protección al desempleo* –a modo de guía programática de la propia RET’84– en el apartado “12.4 El «gran salto adelante»”²³² se examinarán en una perspectiva comparada la redacción final de la Ley 32/1984, así como los artículos 11, 15 y 17.3 de los propios textos pactados entre UGT y Trabajo en noviembre de 1983²³³. Todo ello con el objetivo de proceder a una lectura más global y sobre todo más clarificadora, una vez que ya hayan detallado todos los elementos legislativos que compondrán la propia Reforma del Estatuto de los Trabajadores una vez firmado el AES²³⁴.

Realizado tal inciso, como decíamos el documento de la Secretaria de Acción Institucional cobra una relevancia extraordinaria, por los argumentos que mantendría, en adelante, la Ejecutiva de UGT, de cara a explicar y a justificar interna como externamente tal pacto. Aunque sobre el mismo documento se volverá más adelante, quede ya apuntado lo siguiente: se argumentaría como el “principio de acuerdo gira en torno a dos supuestos defendidos por UGT”.

²³¹ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Organización, “Circular nº 3”, Madrid, 21 de noviembre de 1983, sig. 002606-001.

²³² Véase lo apuntado en la *nota 202*.

²³³ El documento sería localizado dentro de la serie de Comité Confederales: AHFFLC, UGT-CEC, “Comité Confederal extraordinario celebrado en Madrid el 24 de noviembre de 1983”, sig. 02606-001: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Proyecto de reforma del mercado de trabajo”, Madrid, noviembre de 1983. Antes de finalizar el año desde Trabajo se publicaría el citado *pack legislativo* en formato de libro: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical. Proyecto de Ley por el que se modifica determinados artículos de la Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores. Proyecto de Ley de Protección por desempleo por el que se modifica el título segundo de la Ley 51/1980 de 8 de octubre*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983.

²³⁴ Debe reseñarse que en su día tal proyecto apenas suscitaría análisis académicos desde el Derecho del Trabajo hasta la aprobación de la propia Ley 32/1984. Entre otras pocas referencias, MULAS GARCÍA, Alejandro, “Proyecto de Ley por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores”, *Documentación Laboral*, nº 9, (1983), pp. 85-114. Y asimismo una serie de valoraciones técnicas publicadas en la revista de la C.S. de CCOO: “Modificación del Estatuto de los Trabajadores”, *Gaceta Sindical*, nº 28, (1984), pp. 8-9; y, BAYLOS, Antonio, “La forma-tipo de la eventualización”, *Gaceta Sindical*, nº 30, (1984), pp. 19-22.

Distinguida la “contratación temporal objetiva (artículo 15.1 del ET) de los de contratación temporal subjetiva (artículo 17 del ET)”, se señalaría en primer lugar: “Los primeros tienen carácter de permanencia, son tasados, y obedecen a la necesidad de cubrir puestos de trabajo temporales por naturaleza”. Una vez aprobada la Ley 32/1984, la situación será radicalmente diferente. Como se verá en su momento, una de la claves de interpretación tanto del artículo 15 de la RET’84 como a través de su desarrollo legislativo por el RD 2104/1984, entre otras normativas, sería, precisamente, el cuestionamiento del principio de causalidad. Por otro lado, se justificaría la nueva redacción del artículo 17.3 sobre el que pivotará el RD 1989/1984, en base a un argumento que, desde entonces, no se dejaría de repetir: se aceptaba tal ampliación fáctica de la contratación temporal, debido al contexto de crisis, y, por lo tanto, se trataba de un elemento coyuntural dentro del ordenamiento jurídico-laboral. “Los segundos tienen un carácter excepcional, transitorio, obedecen a la situación de crisis en el mercado de trabajo y en principio el empleador puede utilizarlos para la realización de tareas no necesariamente temporales”.

Con muchas más cautelas se abordaría, pese al principio de acuerdo, el contrato *de lanzamiento de nueva actividad*. Así se afirmaría como tras los argumentos presentados por Trabajo, “parece en principio aceptable” tal vía. Señalando, no obstante, lo siguiente:

«Ha existido acuerdo en el sentido de que esta nueva figura contractual, en razón de la complejidad que ofrece y de la carencia de antecedentes, sea detenidamente estudiada por las partes a fin de quede perfectamente acotada y se evite su utilización fraudulenta. UGT ha sido muy firme a este respecto».

Como tiempo tendremos de ver, no pocos debates, críticas y enfrentamientos se desatarían sobre la misma. Por último, el citado informe interno se detenía en la nueva redacción del artículo 17.3 del ET. Tres serían las razones expuestas para aceptar la nueva redacción propuesta. Primero, los nuevos RRDD que pudieran establecerse tendrían una “duración determinada lo que asegura su estabilidad durante el periodo de la Legislatura”. Un argumento, tan cuestionable, como cuestionable sería la contrapartida que se ofrecía: “pero se establece que el Gobierno informa trimestralmente sobre la evolución de la contratación que todos los años se evaluará su funcionamiento a fin de introducir las modificaciones necesarias”. Lo anterior, sin duda, era una pobre justificación ya que a través de no pocas normativas como de alguna resolución parlamentaria –tal y como se ha visto previamente– el Gobierno ya se encontraba obligado a tales tareas. En segundo lugar, se insistiría en cómo se “establecen muy importantes cautelas para evitar el encadenamiento de contratos”. Insistiendo como las mismas “no han existido jamás en los Decretos reguladores de la contratación temporal”. Cautelas que pese a su venta – “Las cautelas en la contratación han sido introducidas merced a la insisten posición de UGT” – no serán suficientes para frenar su masiva como fraudulenta utilización por parte de los empresarios. En tercer lugar, se indicaba como “se establece en seis meses el plazo mínimo de la contratación, lo que permite al trabajador acceder a la prestación por desempleo”. A todo, lo anterior, se sumaría como todo un logro como se incluiría una “indemnización al finalizar el contrato”, aunque todavía estaba pendiente de definir los días años de antigüedad. “No existe todavía pleno acuerdo sobre la cuantía de la indemnización. El Gobierno propone 12 días y UGT reivindica 15 días, en los dos caso, por año de antigüedad”.

Visto esto, lo que quedaba evidenciado, en cualquier caso, eran múltiples cesiones por parte de la UGT en este delicado asunto de la expansión de la contratación temporal, a través de justificaciones y explicaciones que si bien podían servir para salir del *paso*, resultaban difícilmente sostenibles a corto-medio plazo²³⁵.

De vuelta hora a los últimos compases *post-pacto* del proceso negociador, como adelantábamos, el martes 22 Trabajo se reuniría por separado con sindicatos y patronal. En este último caso, se trataba del segundo encuentro público y oficial a efectos prácticos. De poco o

²³⁵ AHHFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Aspectos fundamentales del principio de acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Materia de contratación”, noviembre de 1983? sig. AI-195-05.

nada serviría la misma, más allá del efímero compromiso de Trabajo de no dar, por el momento, cerrada totalmente la mesa de empleo. Así, y con la sorna habitual que caracterizaría a José María Cuevas –entonces Secretario General de la CEOE– este afirmaría a la salida de la segunda reunión con Trabajo como “[e]l eje Moncloa-San Bernardo ha funcionado muy bien”. Refiriéndose a las respectivas sedes del Gobierno y de la UGT, la CEOE se apuntaba al carro de denuncias de ser meras comparsas de todo un gran teatro político entre la UGT y el propio Ministerio de Trabajo. Hasta tal punto que el mismo líder empresarial declararía:

«hasta ahora no podía hablarse de negociaciones. Hemos dialogado, hemos sido informados de cuáles son las intenciones del Gobierno respecto a cobertura de desempleo, mercado de trabajo y ley sindical, pero no puede decirse que hayamos negociado nada».

Por si faltaban pruebas entonces de este cordial entendimiento entre Gobierno y UGT, también el martes 22 de noviembre se entregaría a los agentes sociales el texto definitivo de Ley Orgánica de Libertad Sindical que venía a recoger –y no casualmente– la mayoría de la tesis e inclusive reivindicaciones históricas de la UGT.

Llámesese falta de respeto por las formas democráticas o directamente hipocresía y/o cinismo político, no se tendría empacho en dar menos de 24 horas a los interlocutores para que se leyeran, enmendaran y discutieran la futura LOLS de cara al Consejo de Ministros del siguiente día. Todo un record con el que concluía el muy relativo proceso de “concertación social” a través de la sexta y última reunión celebrada. Ni se quería ni se pretendía que hubiera discusión alguna en una cuestión largamente negociada en secreto con la central socialista. De hecho, había aquí un trabajo de fondo por parte de la CEC de UGT desde prácticamente el inicio de la legislatura socialista, tal y como hemos podido comprobar en más de una ocasión. Se estaba ante la figura legislativa clave que permitiría, en suma, la firma de UGT. La llamada “transacción esencial” del “proceso consensual” en palabras de Oliet Palá²³⁶.

Pero la entrega de aquella documentación, junto con los ridículos plazos dados, evidenciarían, ante todo, una pequeña-gran victoria ugetista que venía a compensar tantos desvelos: desde el Ejecutivo se decidía, por la vía de los hechos consumados, prorrogar el mandato de los representantes sindicales hasta 1986 –es decir, se ampliaban dos años más sin que estuviera previsto en ninguna normativa– al mismo tiempo que se modificaba el tiempo de celebración de las elecciones sindicales de dos a cuatro años²³⁷.

Al día siguiente –miércoles 23– en un gesto más de voluntad de diálogo, el Gobierno daba por zanjado la concertación social en relación al tema del mercado de trabajo. Demostrándose, de hecho, la falsedad del llamamiento realizado a seguir negociando realizado el 22 de diciembre. Ni 24 horas aguantaría, en tal ocasión, la decisión de Trabajo. Dadas las *excepcionales* circunstancias del pacto familiar de noviembre de 1983, ni siquiera tendría sentido proceder a una fotografía del citado pacto social.

Rodolfo Serrano, uno de los más y mejor informados de su tiempo, señalaba en su crónica laboral del día 24 de noviembre lo siguiente:

«De los tres documentos debatidos –reforma del mercado de trabajo, cobertura de desempleo y ley de libertad sindical–, en los dos últimos es donde mayores modificaciones se

²³⁶ OLIVET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 164.

²³⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE considera que la negociación no existe porque las decisiones ya están tomadas”, *El País*, 23 de noviembre de 1983. Al día siguiente desde el mismo periódico se informaba del rápido ir y venir del cambio de criterios del Gobierno con respecto a las posiciones de la UGT: «A las siete de la tarde del martes [22 de noviembre], la decisión a este respecto [con respecto al texto entregado de la futura LOLS] no estaba tomada, dada la fuerte oposición que planteaba CCOO. No obstante, en el texto que se entregó a los sindicatos media hora más tarde ya aparecía recogida la propuesta, que según el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, será, asumida, por su ministerio, salvo que exista imposibilidad jurídica». Noticia, Rodolfo Serrano, “La ampliación del mandato a cuatro años en las elecciones sindicales enfrenta a Comisiones Obreras y UGT”, *El País*, 24 de noviembre de 1983.

han introducido con respecto a la primitiva propuesta del Gobierno. En la reforma del mercado de trabajo estaba prácticamente decidido su contenido [...].

Aunque esta modificación no recoge las expectativas creadas con los anuncios de flexibilización del mercado de trabajo –llegó a hablarse de despido libre– significa un importante avance respecto a la normativa ya existente».

El jueves veinticuatro de noviembre a las 10.00h en la calle Maldonado, 53, sede la Unión Provincial de Madrid, estaba convocado el esperado como en cierta parte *temido* CC extraordinario. Una reunión que pasaría bastante inadvertida en los medios antes y después de su celebración. Sin noticias previas al respecto tanto en *El País* como en el *ABC*, tan sólo en *La Vanguardia* se hablaría de lo siguiente: “Hemos podido saber de fuentes del sindicato socialista, que esta reunión se presente muy polémica a la hora de fijar la negociación colectiva para 1984”²³⁸. No sólo había llegado el momento de poner a prueba las tesis congresuales, sino de adaptarlas a los planes salariales del Ejecutivo. Si el margen de partida era por sí estrecho, éste todavía se había estrechado más tras la reunión con la CEOE del jueves 6 de octubre, en donde se había flexibilizado las posiciones de partida hasta un extremo que sorprendería inclusive a la propia patronal.

Por más que también en el último Congreso se hubiera salido con el objetivo de revitalizar al CC, este llevaba sin convocarse más de seis meses. Las previsibles polémicas pero sobre todo las posibles críticas a la gestión de la CEC, a buen seguro, estallarían. Que la Ejecutiva había venido actuando sin una estrategia definida a corto y medio plazo, y siempre tendente a adaptarse a las circunstancias de cada momento, volverían a evidenciarse un día antes de la celebración del CC. Nicolás Redondo asistiría a una asamblea de delegados de la UGT de Cataluña celebrada en el Palacio de Congresos de Montjuïc. Allí en medio del *calor fraternal* de dos mil compañeros, no tendría empacho en afirmar lo siguiente: “UGT quiere que CCOO esté presente en cualquier mesa de negociación, porque es fundamental su contribución a los acuerdos que puedan suscribir”. Pero como se remarcaba en la crónica de *La Vanguardia* aquella asamblea multitudinaria era en realidad un acto de apoyo a la candidatura de Raimon Obiols a la presidente de la Generalitat de Catalunya. Fuera como fuese, de repente, no sólo las críticas contra Comisiones Obreras desaparecerían momentáneamente, sino que allí se esbozaría una primera explicación al respecto de lo pactado, junto con un aviso al Gobierno. Por el lado de la *explicación*, “Redondo se mostró contrario a una norma legislativa que consagre el contrato temporal y apreció que su sindicato solo lo aceptaba como excepción”. Y en lo relativo al *aviso*, tras denunciar el acoso a los delegados ugetistas por su apoyo descarado al Gobierno, manifestaría como “UGT [...] no estaba de acuerdo con el plan económico del Gobierno, si bien aceptaba una política salarial que redujera la inflación”²³⁹. La *dialéctica ugetista* también aquí demostraba sus dotes adaptativas a las circunstancias y tiempos políticos que imponía la modernización socialista.

La tensión era palpable a primera hora del jueves en la céntrica sede de la Unión Provincial de Madrid. Después de *pasar lista* a los presentes, al haber el necesario *quórum*, se constituiría la Mesa del CC extraordinario, con Antonio Rosa como Presidente, Josefa Pardo como Vicepresidente, y Miguel Vázquez como Secretario de Actas y Julián Castellor como Secretario de Notas. En verdad, el trabajo de Vázquez y Castellor sería en extremo preciso: en tanto se trata de un acta extremadamente corta y en donde muy difícilmente se puede entresacar las dimensiones del debate que allí tuvo lugar. Por no incluir, no incluye ni la intervención de Redondo. A lo que sumó –como se ha dicho previamente– que dicho CC apenas tendría trascendencia en la prensa.

Después de la intervención de Redondo abriendo el CC, se daría una hora a los asistentes para leer los casi ochenta folios del *pack legislativo* laboral, incluyéndose todos los

²³⁸ Noticia, “El comité federal pedirá aumentos salariales del 8%”, *La Vanguardia*, 24 de noviembre de 1983.

²³⁹ Noticia, “UGT quiere que CC.OO. esté presente en cualquier mesa de negociación”, *La Vanguardia*, 24 de noviembre de 1983.

artículos de la futura Ley 32/1984, incluido el documento “Borrador del Real Decreto de desarrollo del artículo 17.3 del Estatuto de los Trabajadores”, base primigenia del futuro RD 1989/1984²⁴⁰. Tal forma de proceder a la hora del debate y discusión de los documentos, ya era habitual dentro de la propia UGT, limitándose enormemente las posibilidades de un debate real. En todos estos años, nunca se optaría por enviar previamente y mediante correo postal la documentación a debatir, a discutir.

Retomada la sesión, y tras una intervención de Saracibar al respecto de cómo habían transcurrido las negociaciones con respecto a la LOLS y la modificación de los Títulos II y III del junto con el artículo 33 del ET, tomarían la palabra Justo Zambrana, César Braña, Antonio Puerta, Vicente Bermúdez, Teodoro Escorial, Luís Aparicio, Antonio Cebrián y C. González. Poco más se supo acerca del contenido de las intervenciones como de la contestación de la CEC. Se aprobaría el mismo con tan sólo 4 votos en contra y otras cuatro abstenciones.

Con respecto a la RET'84, le tocaría el turno a Zufiaur de explicar el contenido de la misma. Y este sí era un asunto delicado para el conjunto de la UGT. Intervendrían Manuel Arribas, César Braña, Alberto Pérez, Benjamín Castro, Manuel Bonmati, Antonio Cebrián, Rafael Giménez, Victoriano Sánchez, José M. Buzarra y Arturo Val, “valorando el documento”. Tampoco se conoce su contenido así como las respectivas respuestas de Corcuera y nuevamente de Zufiaur. Se aprobaría el citado *pack legislativo* con un voto en contra y cinco abstenciones. Cierre, por tanto, en banda al respecto. Otro tanto sucedería con la modificación de la LBE: dos votos en contra y tres abstenciones.

Pese a lo que pudiera pensarse, en un primer instante, más complicado sería sacar adelante los proyectos de reconversión y reindustrialización. Se terminaría sacando la postura de la CEC con respecto a la extinción de los contratos, por dos votos en contra y diez abstenciones. Y finalmente en relación a la negociación colectiva, se darían por buenas las previsiones del Ejecutivo del 8% de inflación y un incremento del 6,5, “lo que permitirá una política de solidaridad y el mantenimiento del poder adquisitivo”, siempre y cuando se incluyera una cláusula de revisión salarial. Se aprobaría tal esquema de negociación con tan sólo dos abstenciones²⁴¹.

La reunión del CC terminaría a altas horas de madrugada. El viernes 25 ningún medio informaría, incluyéndose aquí *El País*. En realidad, y pese a disponer en esta ocasión, de la documentación primaria fundamental, poco o más se puede indicar. Especialmente cuando se tiene presente que los diferentes medios de comunicación, se limitarían a recoger una simple nota de prensa, incluido *El País* nuevamente. Así el sábado 26 lo máximo que se pudo saber es que la UGT negociaría en torno al 8% en el próximo proceso de negociación colectiva. Una cifra, en todo caso, que “podrá ser modificada en función de las mejoras que se consigan en el transcurso de la concertación social”. Lo que traducido en otras palabras significaba que, incluso, se podía aceptar una cifra menor. Igualmente se filtrarían las duras críticas a CCOO por estar “defendiendo intereses corporativistas de la clase trabajadora”, en relación al 10% de subida salarial defendido por esta central²⁴². Negando, por lo demás, la posibilidad de acuerdo con las propias Comisiones Obreras, de quienes recelaban ante su llamada a la unidad. “Si con su actitud se quedaba fuera, nosotros iremos en solitario”²⁴³.

²⁴⁰ Esta misma documentación ha sido localizada en la serie de los Comités Confederales: AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Organización, “Comité Confederal Extraordinario celebrado en Madrid el 6 de octubre de 1984”, sig. 002607-003. En el citado *dossier* se incluiría todo el *pack legislativo* completo. A saber, la futura Ley 31/1984 y la LOLS. Documentación que no tenía fecha.

²⁴¹ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Organización, “Acta de la reunión del Comité Confederal extraordinario celebrado en Madrid el 24 de noviembre de 1983”, sig. 02606-001.

²⁴² Noticia, “CCOO propondrá un 10% de incremento salarial para 1984”, *El País*, 27 de octubre de 1983.

²⁴³ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT defenderá un 8% de incremento como referencia en las subidas salariales”, *El País*, 26 de noviembre de 1983. El resto de crónicas periodísticas se limitarían a lo dicho:

Inclusive en la vuelta de *Unión* a la calle –tras casi medio año sin publicarse– poco o nada se señalaría sobre el citado CC, y ello a pesar de que sus páginas siempre se podía encontrar las resoluciones y decisiones más importantes aprobadas. De hecho, tal número destacaría por omitir cualquier referencia de la RET’84, cuando, por el contrario, se ofrecerían sendas crónicas a la LOLS o la LBE, sin ir más lejos²⁴⁴. Más atención le dedicarían desde las páginas de *El Socialista*. Después de resaltar como el Comité Confederal extraordinario había sido convocado de “forma súbita”, dedicaría un par de líneas a los “escasos votos en contra del paquete de medidas negociado con el Ministerio de Trabajo”. Recogiendo, por lo demás, unas declaraciones de Zufiaur resaltando como tal “paquete de medidas acordadas es muy favorable”, y en cuanto a la flexibilización de la contratación temporal señalando como “va a favorecer la creación de empleo sin desestabilizar el mercado de trabajo y sin que se pueda abrir la perspectiva que nos temíamos de que los contratos indefinidos pudieran transformarse en temporales”²⁴⁵.

Hasta la aprobación en el Consejo de Ministros el miércoles 30 de noviembre del tantas veces citado *pack legislativo* del mercado de trabajo, junto con los PGE de 1984, tendrían lugar no pocos acontecimientos que volvían a poner entredicho la estrategia ugetista. De esta forma, y una vez aprobados y convalidados los propios PGE el mismo jueves 24, tras fuertes críticas por las partidas destinadas al gasto social, y, en concreto, en lo relativo a las pensiones por parte de no pocas fuerzas parlamentarias en el Congreso²⁴⁶, las negociaciones para la reconversión parecían enrocarse sin posibilidad de salida alguna. Todo ello mientras que en la calle Comisiones Obreras era capaz de movilizar a más de 100.000 trabajadores del metal –el viernes 25 de noviembre– en otra nueva jornada de lucha. No tardaría en llegar las reacciones: UGT afirmaría su escasa incidencia y Alfonso Guerra trataría de deslegitimarla afirmando como se trababa de movilizaciones políticas²⁴⁷.

De esta forma, y aun par de escasos días del decisivo Consejo de Ministros, la CEC de UGT se volvía a reunir. A lo largo de aquella mañana del martes se fijaría como principales objetivos tratar de introducir en el último momento sus “criterios básicos” en relación a la LOLS como en el proyecto de Reindustrialización, “dentro de la valoración positiva que globalmente se hace de los mismos”²⁴⁸. En lo que no dejaba de ser un *gesto voluntarista* en extremo, tal decisión llegaba un día después de que Solchaga hubiera dado por finalizado el proceso negociador sobre la reconversión, viniéndose abajo la pretensión de UGT de evitar la revisión por la suspensión de los contratos de los futuros trabajadores afectados por los proyectos de reindustrialización²⁴⁹. Una posición, nos referimos a la de Industria, que se mantendría inalterada en una especie de *última reunión extra* con UGT y ELA-STV y que

Noticia, “UGT partirá de aumentos del 8% en la negociación colectiva de 1984”, *La Vanguardia*, 26 de noviembre de 1983; Noticia, “UGT propone un incremento salarial del 8 por 100”, *ABC*, 26 de noviembre de 1983.

²⁴⁴ “Habrà mayor cobertura” y “Una herramienta para fortalecer el sindicalismo”, ambos publicados en *Unión*, nº 44 (0) (1983), pp. 6-7.

²⁴⁵ PADILLA, Sol, “UGT pedirá el 8 por 100 de subida salarial”, *El Socialista*, nº 338, (1983), pp. 30-31. Debe advertirse como a lo largo de los siguientes meses cualquier referencia a esta materia desaparecía de las páginas del citado medio.

²⁴⁶ Noticia, “Fuentes críticas al recorte anunciado en pensiones”, *ABC*, 25 de noviembre de 1983.

²⁴⁷ Noticia, “100.000 trabajadores del metal se movilización en contra de la reconversión, según CCOO”, *El País*, 26 de noviembre de 1983.

²⁴⁸ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 14. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 29 de noviembre de 1983”, sig. 002251-003.

²⁴⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Las negociaciones sobre reconversión industrial acabaron sin acuerdo”, *El País*, 29 de noviembre de 1983.

duraría hasta la madrugada del día 29. De hecho, Solchaga en esta primera fase de negociaciones no cedería, y así llegaría tal proyecto al citado Consejo de Ministros²⁵⁰.

Finiquitado cualquier margen de reacción, CCOO, ahora sí, sería consciente de lo que realmente había sucedido, y que no era otra cosa que UGT y Trabajo había negociado por separado y en secreto. ¿Baño de realidad? ¿Traición? O simplemente, ¿engaño? Lo único cierto es que, en buena parte, se confirmaban las tesis estratégicas de junio de 1983, cuando no se había descartado que pudiera suceder lo que, a fin de cuentas, había sucedido. De cualquier forma, la posible reacción llegaba demasiado tarde. Después de la reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO del lunes 28, tendría lugar al día siguiente un CS, en donde tras una tensa reunión se sacaría una contundente resolución una vez discutido el *informe* presentado en el encuentro previo de la Ejecutiva. Así en su primer punto se podía leer:

«1.º Rechazar la disposición con que los representantes del Gobierno han ido a las mesas de negociación, caracterizada por la fijación previa de unos techos para cada uno de los temas, dejando exclusivamente a los sindicatos de modificar aspectos parcial de los mismos».

La tesis, por tanto, del *pacto previo* se confirmaba. En relación a los contenidos se rechazaría frontalmente la reforma del trabajo, que suponía “la generalización de la contratación temporal de los trabajadores, sin límites en el tiempo ni en la proporción, hasta ahora existente, entre fijos y eventuales”. Similares críticas se repetición en cuanto a la LBE, la LOLS –en donde se llegaría a denunciar la pretensión de cómo ampliar el mandato de los delegados supondría un desgaste de los “órganos de representación unitaria de los trabajadores” –. Pero si duro sería en los contenidos, más lo sería con respecto a las formas:

«2.º Expresar su desacuerdo por las extraordinarias prisas con que se han querido realizar y cerrar las conversaciones, convirtiendo de hecho la necesaria negociación en un acelerado trámite de consulta y recogida de modificaciones parciales a los proyectos del Gobierno».

Con todo se valoraba como positivo dos cuestiones. Primero, los resultados de las movilizaciones, que habían mejorado las “posiciones iniciales en el Gobierno en las mesas de concertación”, en especial en relación a la desaparición de la “discriminación que existía para los trabajadores de la Construcción y Hostelería en cuanto al mínimo tiempo para la contratación temporal”. Dicho esto, el resto del balance era claramente negativo, especialmente teniendo en cuenta que tanto el PEMP, los PGE y el Libro Blanco sobre la reconversión, “no han sido negociados ni modificados”. Dispuestos a dar a seguir dando la *batalla*, al mismo tiempo, en que no se renunciaba a seguir movilizando a la organización en los centros de trabajo y en la calle, se exigía una reunión con el Gobierno, sindicatos y patronal, “tendente a corregir los serios defectos de método; reconsiderar los contenidos, dado el tremendo costo social y los más que dudosos efectos sobre la reducción y, en todo caso, evitar que se den por cerrados estos temas de la concertación”. Una salida parcialmente *honrosa* en donde se demostraba como CCOO no había renunciado a seguir negociando, a la par que también suponía un gesto destinado a la galería sabiendo cómo había transcurrido todo el proceso negociador²⁵¹. Mandatada la Ejecutiva para tomar las decisiones oportunas, Camacho el día 30 tildaría todo el proceso de “cacicada” y denunciaba la “grave parcialidad del Gobierno y un apoyo descarado al modelo sindical propugnado por UGT”²⁵².

²⁵⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT no aceptará la reconversión industrial si se mantiene en el proyecto de ley la rescisión de contratos”, *El País*, 30 de noviembre de 1983.

²⁵¹ En primer lugar, consúltense, las duras y fuertes reacciones de CCOO: AHT, CCOO-CEC, “Acta de la reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Confederal del día 28-XI-1983”, sig. 001-00039; y, AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión del Consejo Confederal del día 29-XI-1983”, sig. 2-10, en donde se adjunta “Resolución del Consejo Confederal de la C.S. CCOO del 29 de diciembre de 1983”.

²⁵² Noticia, Rodolfo Serrano, “Comisiones Obreras denuncia que el Gobierno «apoya descaradamente» a UGT”, *El País*, 1 de diciembre de 1983.

Cuando se cumplía el primer aniversario, el Ejecutivo socialista sacaba adelante el mayor conjunto de medidas económicas y laborales de toda la legislatura, junto con otras medidas impopulares como la subida de los impuestos. Más allá de las celebraciones oportunas, o de cómo el PSOE aseguraría que había cumplido el 63% de su programa electoral²⁵³, de las encuestas, de los artículos de opinión publicados en aquellos mismos días, quizás, tan sólo quizás, las declaraciones más significativas vendrían de la mano de uno de los *azotes* de los gobiernos socialistas, José Antonio Segurado, caracterizado por sus frecuentes *salidas de tono* y la radicalidad de sus propuestas. El Presidente de la CEIM daría un *notable* al Gobierno de González, “por haber sido quien mejor ha contactado con el mundo empresarial de todo su Gabinete, quienes no han sabido plasmar dicha sensibilidad en el «BOE»”²⁵⁴.

Por lo demás, y como destacaría un editorial *El País*, a pesar de que aquel amplio conjunto de medidas, podía mermar la imagen del Gobierno a escasos días del primer aniversario de *El Cambio*, no obstante cabía atribuirse tal *maniobra* a la habitual habilidad estratégica de los socialistas.

«Muchos preguntarán la razón de que el Gobierno no haya ocultado su propósito de aplicar una política de rigor ni siquiera, en vísperas de los festejos oficiales organizados con ocasión del primer aniversario de su llegada al poder. La razón tal vez haya que buscarla no tanto en la voluntad de ejemplaridad moral del poder ejecutivo como en su habilidad para la maniobra estratégica. En efecto, las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros [...] parecen encaminadas, por un lado, a cumplir el pronóstico formulado por el Gobierno a comienzos de año sobre el alza del coste de la vida, y por otro, a continuar esa viaje tradición de apego al BOE que tan frecuentemente olvidaba que la política económica es mucho más que un conjunto de disposiciones legales»²⁵⁵.

Por tanto, se cerraba así una gran primera etapa marcada en las últimas semanas por una aceleración de los tiempos políticos. Como veremos en el siguiente epígrafe, a lo largo de los seis siguientes meses (largos) la RET’84 entraría en una especie de “fase de hibernación parlamentaria” hasta su aprobación a finales de julio de la Ley 32/1984. Sin querer adelantar acontecimientos, lo cierto es que contrastaría las exigencias gubernamentales de acelerar las reformas estructurales, con la tranquilidad de rematar la *magna obra* en los siguientes meses.

En todo caso, durante todo este periodo se consolidaría un proceder negociador, que nos ayuda a apuntalar dos hipótesis centrales de cara a interpretar tanto el contenido de la reforma del mercado de trabajo así como el modelo de concertación que se empieza a ensayar en tiempos socialistas: en primer lugar, todo parece indicar como la elaboración final del articulado de la RET’84 –probablemente no fuera así con respecto al documento titulado *Reforma del mercado de trabajo, fomento del empleo y protección del desempleo*²⁵⁶– si bien no se realizó de forma conjunta si se llevó a cabo, paso a paso, entre técnicos del Ministerio de Trabajo y de la propia UGT a través de un intercambio de información fluida a lo largo de aquellos últimos meses, intensificándose tales relaciones en los días previos al principio de acuerdo. Comprobado y verificado que la CEC de UGT tendría en su poder el documento de la

²⁵³ Noticia, “El PSOE considera cumplido el 63 por 100 de su programa”, *ABC*, 30 de noviembre de 1983.

²⁵⁴ Noticia, Mariano Guindal, “Segurado elogió la gestión del Gobierno socialista en su primer año de mandato”, *La Vanguardia*, 1 de diciembre de 1983.

²⁵⁵ Editorial, “Subidas de aniversario”, *El País*, 2 de diciembre de 1983.

²⁵⁶ Sobre la LOLS se señalaba lo siguiente: «Posiblemente, la Ley Orgánica de Libertad Sindical sea el mejor ejemplo de buenas relaciones entre viejos camaradas. Los representantes de Trabajo mantuvieron agotadoras y numerosas sesiones con UGT para perfilar su contenido. Sin ser excesivamente favorable a los principios de UGT en esta materia, la ley recoge los más importantes criterios que esta organización ha venido defendiendo; ampliación de la celebración de las elecciones a cuatro años, reducción del período del cómputo y consagración de las secciones sindicales. Y, sobre todo, alargar el mandato de los actuales delegados en otros dos años». Reportaje, Rodolfo Serrano, “Días de vinos y rosas”, *El País*, 8 de enero de 1984.

reforma laboral desde mediados de octubre, y por tanto unas semanas antes que el resto de los interlocutores sociales –como un elemento novedoso en términos históricos, ya que hasta el momento no se había entrado en tales cuestiones o matices– resulta así bastante más sencillo explicar los cauces a través del cual se operaría el citado el “milagro” acontecido entre el 17 al 18 de noviembre. Lo anterior, también nos acerca a interpretar de mejor forma las dimensiones finales de la futura Ley 32/1984. Una hipótesis fuerte pero coherente con el desarrollo de los acontecimientos hasta su resolución final como acabamos de examinar detenidamente.

De la misma forma, a lo largo de los siguientes meses desde las páginas de *El País* y de otros medios no se dejaría de insistir en la idea de que el documento menos debatido sería, precisamente, la RET’84. Sin llegar hablar de consenso, desde la prensa no se tendría mayores reparos en profundizar en tal tesis. A saber, la de la redacción conjunta o al menos coordinada entre UGT y el Ministerio de Trabajo, hasta el punto de presentar –o mejor dicho auto-presentarse– un documento consensuado, para proceder, a continuación, a la puesta en escena teatral de la concertación social²⁵⁷.

La hipótesis del pacto secreto que se ha mantenido aquí, se encuentra, además, apoyada por una de las fuentes más “fiables” localizada hasta el momento: las crónicas laborales de Rodolfo Serrano para el diario *El País*. Mes y medio después del acuerdo para la RET’84, y en un momento de cierta tensión entre las cúpulas del Ejecutivo y de la UGT, el citado periodista publicaba un amplio reportaje el domingo 8 de enero de 1984, en lo que llegaría a calificar unas “relaciones apasionadas”.

En la segunda parte del citado reportaje bajo el título, “Días de vino y rosas” comenzaba indicando como la “central socialista ha tenido sus días *de vino y rosas* con el Ejecutivo y ha aprovechado, a veces con ventaja, sus influencias en las áreas de decisión del Gobierno y de la Administración”. Justamente exponía como el ejemplo más acabado de esta influencia mutua había sido el pacto para la reforma del mercado de trabajo, incluida la futura LOLS a modo de cierta contraprestación por la primera de las reformas²⁵⁸. Una influencia que descrita metafóricamente como una *partida de mus* venía a expresar iconográficamente el método de negociación ya apuntado. Así se afirmaba lo siguiente:

«La flexibilización del mercado de trabajo fue, en efecto, objeto de numerosos encuentros, a veces a altas horas de la noche, entre dirigentes ugetistas y representantes del Ministerio de Trabajo. Era lo que alguno de los asistentes calificaba de “partida mus”, y en los que los criterios del Gobierno eran suavizados por UGT. Prácticamente todo el paquete laboral de la concertación social fue preparado previamente en estos y parecidos encuentros. Las tensas relaciones que la UGT mantenía con Almunia con motivo de la ley de 40 horas se dulcificaron en *estas partidas de mus*, en las que la central socialista fue exponiendo hasta donde podía llegar»²⁵⁹.

¿Es suficiente la anterior afirmación de Rodolfo Serrano, junto con lo extraído de las actas de la CEC de UGT, para dar por válidas la hipótesis hasta ahora mantenida sobre la forma, métodos y tiempos políticos que caracterizaron la negociación de la RET’84? Sí, pero de forma parcial.

De hecho, se tiene que recurrir a la tesis doctoral de Javier Astudillo –*Las contradicciones del socialismo*– de cara a completar lo anterior. A partir de su modelo de explicación de las llamadas “relaciones solidarias” entre UGT y el Gobierno, especialmente después de octubre de 1982, aportaría una serie de caminos de aproximación analíticos a tener

²⁵⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “La ampliación del mandato a cuatro años en las elecciones sindicales enfrenta a Comisiones Obreras y UGT”, *El País*, 24 de noviembre de 1983.

²⁵⁸ Como recordaría Cerviño: «En definitiva, UGT estaba dispuesta a asumir los sacrificios que suponía apoyar la política del gobierno, como la moderación salarial, porque confiaba en que tendría efectos positivos sobre la economía, pero en especial, sobre su poder organizativo». CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, op.cit., p. 177.

²⁵⁹ Reportaje, Rodolfo Serrano, “Días de vinos y rosas”, *El País*, 8 de enero de 1984.

más que presentes. Primero, el acuerdo entre UGT y PSOE/Gobierno de que se “podrían poner de acuerdo sobre cómo discrepar ante la opinión pública cuando no se pusieran de acuerdo en alguna cuestión”, todo ello a partir de unas propias declaraciones del mismo Almunia. A ello se sumaría, como igualmente reconocería quien fuera Ministro de Trabajo y Seguridad Social, las frecuentes reuniones de “carácter privado” que se mantendría durante toda la primera legislatura, lo que permitiría establecer un *canal abierto* de negociación fundamental. Así por “cada reunión formal con las dos centrales sindicales, o con las dos y la CEOE, había unas tres reuniones *privadas* con UGT”. Más aún, pues tras un Comité Federal del PSOE celebrado entre el 23 al 24 de julio de 1983 –y sobre el que nos detuvimos en su momento– se decidiría constituir una “comisión mixta PSOE-UGT formada por tres miembros de cada Comisión Ejecutiva más el secretario sindical del PSOE [Manuel Chaves] para encarar sus relaciones”²⁶⁰. Es decir, nacería lo que se llamaría un Comité de Enlace, aunque, en realidad, tuviera una muy escasa utilidad²⁶¹. Tan sólo, desde esta suma de perspectivas apuntadas, parece posible entender ciertos *milagros* pero sobre todo que no se quebrará la *familia socialista* durante la más dura como reformista legislatura socialista.

Con todo, lo que no explica el anterior conjunto de interpretaciones es algo básico: la posterior legitimación así como la defensa a ultranza de aquel pacto, sin prácticamente moverse una coma durante su negociación parlamentaria por parte del Gobierno y del propio PSOE. Es decir, a modo de segunda hipótesis, lo que se ensaya en estos meses, a pesar de todas las dificultades, encontronazos, roces personales, giros estratégicos y no pocas mini-crisis, es un modelo de negociación en una doble vertiente –pública y privado (y/o secreto)– que tendría una corta vida política. Es decir, tan sólo sería útil en este caso y al año siguiente durante la negociación y firma del AES. Un modelo de negociación sustentando más que en base a confianzas o amistades personales entre las partes en juego, o en la asunción de una misma política económica; en la necesidad de no tensar en extremo las relaciones de familia, siendo sabedores los sujetos implicados –Partido, Gobierno, Sindicato– que más allá de diferencias mínimas en el seno de la gran estrategia de la modernización socialista, por este camino podían obtener resultados más óptimos para todos los implicados, que en base a un modelo de concertación social abierto, público y competitivo en términos reales que no teóricos. O como apuntaría Oliet Palá:

«La fachada de legitimidad que daba la bilateralidad pública servía a otra bilateralidad, mantenida fuera de la organización, entre el Gobierno socialista y sus aliados ugetistas, en la que se podían satisfacer intereses y objetivos organizativo»²⁶².

Pero, a su vez, este modelo de negociación que se ensaya entre marzo/mayo a noviembre de 1983, tiene un conjunto de costes no directos o indirectos, previsibles como imprevisibles. En primer lugar, la derrota parcial, en este caso, del *equipo económico de Boyer* en tanto finalmente se pactan limitaciones a la liberalización de la contratación temporal en pos de garantizarse el apoyo de la central ugetista²⁶³; en segundo lugar, la definitiva fractura dentro de una ya sería dañada unidad sindical es otro de los resultados directos de este modelo de

²⁶⁰ En concreto, AHFPI, PSOE, Secretaria de Política Sindical, “Informe de Gestión. Febrero 1983-julio 1983”, sig. Fc 3984, p. 55. Véase aquí también: Noticia, “El Gobierno y UGT cumplen papeles distintos, afirma Txiki Benegas”, *El País*, 29 de diciembre de 1984.

²⁶¹ ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, *op.cit.*, pp. 165, *nota 35*, 171 y *nota 52* y 173, *nota 59*.

²⁶² OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, *op.cit.*, p. 143.

²⁶³ Por el contrario, y pese a la abundancia de datos y evidencias, Ricardo Martín, el ‘biógrafo amable’ de quien fuera Ministro de Trabajo, atribuye a Almunia la paternidad de todo el *pack legislativo*. MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, *op.cit.*, p. 120. Asimismo el citado autor recogería unas alabadoras palabras de Boyer, quien llegaría a hablar de la *reforma de Almunia*: «la preocupación por maximizar el empleo y por hacer más flexible el mercado de trabajo español tuvo una manifestación importante en la reforma de las modalidades de contratación laboral, plasmada fundamentalmente en la Ley de Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 2 de agosto de 1984». *Ibíd.*, p. 126.

negociación por el que se apuesta, aún a riesgo de que se inicie una escalada de conflictos obreros y sociales, tal y como así sucedió. No obstante, lo que este modelo garantiza –desde la perspectiva gubernamental y en menor medida desde la visión de UGT en su búsqueda de la hegemonía sindical– es la marginación de la CCOO de las decisiones realmente relevantes²⁶⁴. Todo ello por más que obligará a fijar un “nuevo rumbo en la técnica de las negociaciones”²⁶⁵. Y, por último, una tercera consecuencia de este modelo de negociación es la definitiva teatralización y profesionalización política que seguirá, en adelante, todo proceso de concertación social, y que, anteriormente, se había venido ensayando de forma más bien “amateur”. Así pues, se está en la antesala de que el “modelo español de concertación social” entre en su *fase de desarrollo superior*.

En el terreno, ahora, de las valoraciones o conclusiones, lo primero que cabe indicar, ya en términos históricos, es el “salto adelante” que se da en relación a la transformación liberalizadora, a nivel global, del mercado de trabajo con la RET’84. Un giro radical con el apoyo de la UGT, el consentimiento de la CEOE y el rechazo frontal de CCOO. *Un giro*, además, que tiene otro conjunto de ramificaciones. La primera, es que tal *pack legislativo* va mucho más allá de lo planteado a nivel del programa socialista, a pesar de la clásica ambigüedad calculada de los mismos; segundo, dicha reforma consolidaría el cada vez más evidente *giro a la derecha* del Gobierno socialista. O si se prefiere, el *giro liberal*. Por lo demás, una tercera conclusión ha apuntarse es el fuerte reforzamiento de la legitimación política del proyecto socialista de modernización al haber conseguido, por un lado, el acuerdo con UGT y, por otro lado, no haberse enfrentando a la CEOE en tal materia.

10.2.3. Crisis y agonía final del *non nato* Acuerdo Interconfederal de 1984: el extraño caso del «proceso de hibernación parlamentaria» de la reforma del Estatuto de los Trabajadores (diciembre 1983-febrero de 1984)

«El Gobierno no iba a exultar de alegría si se rompía la concertación, pero estaba muy lejos de considerar el hecho un desastre nacional.

Es evidente que estos criterios son compartidos, si acaso con alguna matización, por el empresario. Pero a esto, además, se puede añadir que los acuerdos interconfederales han dejado de serle útiles como instrumento de relaciones laborales. Desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores hasta la fecha los sucesivos acuerdos han creado un marco que la patronal considera lo suficientemente experimentado y establece y al que por lo mismo ya no le resulta el acuerdo interconfederal imprescindible».

Editorial, “El reto de la nueva negociación”, *Gaceta Sindical*, febrero 1984²⁶⁶.

En el tránsito del año ochenta tres al ochenta y cuatro se va a atenuar, de forma parcial, el espíritu arrollador reformista del socialismo español, coincidiendo con los *fastos* del primer aniversario en el poder. Así, el primer año de la época socialista se había evidenciado como difícil en lo político, complicado en la gestión de lo cotidiano, pero sobre todo había revelado como el apoyo electoral en las urnas no iba a tener una traducción automática en un apoyo popular al Gobierno. La legitimación política del proyecto socialista constituía, pues, un reto pendiente. Por tanto, a lo sumo cabría hablar de aceptación ciudadana pasiva de los sinsabores

²⁶⁴ Acerca de los cambios del método de negociación sobre la marcha véase, Noticia, Rodolfo Serrano, “La ampliación del mandato a cuatro años en las elecciones sindicales enfrenta a Comisiones Obreras y UGT”, *El País*, 24 de noviembre de 1983.

²⁶⁵ OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 190.

²⁶⁶ Editorial, “El reto de la nueva negociación”, *Gaceta Sindical*, nº 0 [segunda época], (1984), p. 3.

y demás sacrificios del *mandato* de la “única política posible”. Lo que no era poco, teniendo en cuenta que el país llevaba sumergido en una crisis económica más de siete años.

A pesar de esta *aceptación pasiva* del trance modernizador²⁶⁷, en el momento en que se agudiza los posibles ángulos de visión, en términos históricos, lo que se observa es un contexto potencialmente conflictivo como ya se ha afirmado alguna vez. Se asiste en este mismo tiempo, a una velocidad considerable, al tránsito del modelo movilizador antifranquista, a uno diferente más adaptado a las nuevas circunstancias, pero en donde todavía se conservarán no poca herramientas y estrategias de lucha previas. Igualmente, si los socialistas –bien dentro del Partido, bien dentro del Gobierno– habían aprendido no pocas lecciones, desde el campo sindical otras tantas se habían interiorizado: comprobados los límites de la voluntad política y económica del *cambio socialista*, repleta de *signos externos* que, poco o nada, tenían que ver con el mundo del trabajo, el escenario de futuro nada aventuraba en positivo desde esta última perspectiva apuntada. A *calentar* el mismo, el Ejecutivo contribuiría a su manera con el PEMP, el PGE, la reforma del mercado de trabajo, la Ley de Reconversión Industrial y otros tantos pequeños detalles, para sumarse como corolario la política de radical moderación salarial.

Por estos caminos, se pasaría de las grandes movilizaciones de carácter tanto político-económico y social de la última etapa de los gobiernos centristas, a un descenso de los conflictos de índole laboral en 1983 en su primera mitad, para dar inicio un serio reputo tal tipo de movilización a lo largo de los últimos meses del año citado. De hecho, nos encontrábamos con el preámbulo del muy conflictivo largo I Trimestre de 1984. Un ciclo conflictivo en el que el elemento político disminuye en importancia –por más que desde el entorno socialista sustentar su estrategia discursiva, precisamente, en cuestionar la legitimidad de los conflictos obreros por su contenido político, en un viaje de ida y de vuelta bastante peligroso para el conjunto de la izquierda político-sindical– y en el que elemento económico-social se constituye en la hipótesis explicativa central. Esto no significa, por el contrario, que no se vaya extendiendo una crítica social cada vez más generalizada a la política liberal y por extensión “anti-obrera” practicada por el Gobierno socialista. Pero como también demostrara este tiempo de paradojas, una cosa era la extensión de la crítica a los socialistas, y otra muy diferente que las mismas tuviera un *coste electoral*.

Una transición del modelo de protesta con dos características no menores: la fragmentación cuando no regionalización del conflicto obrero, tanto por lo particular de las reivindicaciones como por las estrategias que se imponen dentro del sindicalismo más combativo de las Comisiones Obreras –principal sujeto impulsor de este ciclo de protestas junto con otras fuerzas sindicales minoritaria–s. A lo que va a añadirse otro rasgo típico del ciclo de protestas, que bien se puede extender hasta el final del duro año ochenta y cuatro: un incremento de la radicalización obrera basado en un mayor uso de la violencia física, hasta alcanzarse situaciones de autogestión obrera en grandes empresas, e inclusive la propia autogestión de municipios enteros una vez expulsados los cargos públicos electos correspondientes. El ejemplo más definido aquí, sin ningún tipo de dudas, sería el caso de la movilización social en torno al cierre de los altos hornos de Sagunto. Estamos, en suma, ante la última fase de lucha de clases en la España contemporánea.

Sin embargo, lo realmente interesante, desde una perspectiva a medio plazo, será la capacidad de control del Ejecutivo socialista de cara a que no estallara un conflicto social generalizado. Por un lado, la adopción en diferentes tiempos políticos –dividiéndose a su vez en diferentes fases regionales– del proceso de ajuste de desindustrialización, resultaría efectivo desde esta perspectiva; por otro lado, la legitimidad política e institucional derivada de los resultados de las elecciones de octubre de 1982 y de mayo de 1983 también devendrá en un factor explicativo de primer orden. Asimismo no debe minusvalorarse el hecho de que el Gobierno tras su primer impulso reformista radical comandado por el *equipo de Boyer*, y en donde la posibilidad del acuerdo social carecía valor estratégico; poco a poco diera dando pasos

²⁶⁷ Consúltase lo expuesto en su momento en el apartado “4.1. El «partido de la modernización»: las raíces políticas, ideológicas y culturales de la *metamorfosis* del PSOE”.

en otro sentido, al moderar ciertas declaraciones, negociando cuando se tenía que negociar y sobre todo no abriendo más frentes de los que podía afrontar con posibilidades de éxito. Exactamente, esta desactivación, caso por caso, de un conflicto de índole global ha hecho disminuir a ojos del historiador –así como de otros tantos observadores– la relevancia de este ciclo de protestas que acompañaron –y de qué forma– a los primeros pasos de los gobiernos socialistas. Lo cual ha tenido otra “virtud” dentro de las visiones mayoritarias –demasiado *amables* en su mayoría– que han predominado las lecturas posibles de este tiempo: invisibilizar este ciclo de protestas, conformándose a lo sumo con mencionar ciertos grados de desencanto y/o disenso dentro de algunos sectores populares y trabajadores.

Ahora bien, de cara a cerrar este conjunto de explicaciones que vendría, en gran medida, a responder a la pregunta, *¿por qué no se convocó una gran huelga nacional de cara a frenar las reformas (neo)liberales socialistas?* La respuesta, y tal como acabamos de ver en los dos anteriores epígrafes, parece bastante lógica y clara: primero, no se tenía la suficiente fuerza ni capacidad por parte de ninguno de los actores opositores implicados. Pero sobre todo en caso de convocarse una huelga general y esta pudiera llegar a triunfar –opción no descartable, tal y como estaba de transcurrido aquel año– conllevaba el riesgo de una desestabilización general demasiado alta, teniendo presente la falta de una alternativa política potencial y viable que dado el caso, hubiera tenido que tomar las riendas del poder político. A este proceso de desactivación paulatina de la conflictividad también “ayudaría” la división sindical. A lo que se sumaría, tanto durante 1983 y 1984, los diferentes procesos congresuales por los que atravesaría tanto la UGT como CCOO. Si en el primer caso, la UGT tendría que poner en marcha la modificación de toda su línea política, aunque sin afrontar problemas de cohesión organizativa; en el segundo caso, Comisiones Obreras sin proceder a *giro estratégico* tan radical en su III Congreso Confederal de 1984, en cambio triunfarían las posiciones más “aperturistas” y “dialogadoras”, con no pocos enfrentamientos internos, lo que lastraría potencialmente al sindicato a encabezar una política de movilizaciones con mayor intensidad que la entonces llevada.

Pero aquí también se ha olvidado cuando no se ha pasado alegremente por alto, que tanto durante la negociación de la RET’84 como durante la negociación del AES, se llevarían a cabo un conjunto de importantes movilizaciones sociales, y claro está, de contenido político. Probablemente sin los efectos sindicales deseados, pero no por falta de potencialidad. Encadenándose, de hecho, con todas y cada una de las movilizaciones contra la ampliación de la contratación temporal que se venían sucediendo desde hacía años. En cualquier caso, si en el caso de la reforma del mercado de trabajo de fines de 1983, en la práctica las mismas pueden calificarse como de un “fracaso”; en el caso del Acuerdo Económico y Social, y cuando las consecuencias económicas y sociales tanto de la crisis económica como de las políticas socialistas ya eran más visibles, más palpables, éstas tuvieron una mejor aceptación popular, además de estar mejor dirigidas y organizadas. Ahora bien, todavía un año tendría que pasar, de cara a que se diera la transición de la atomización del conflicto a su generalización, como se demostraría con la convocatoria de huelga general en junio de 1985 como contestación a la reforma de las pensiones. Un tiempo en donde las heridas del III Congreso Confederal de CCOO empezaban a estar cicatrizadas.

De cara a establecer las bases económicas, sociales y políticas –por este orden y no otro– de la extensión y consolidación de este nuevo ciclo conflictivo, ha de atenderse a los últimos requerimientos por llegar a un Acuerdo Interconfederal para el año 1984. No faltarían –siguiendo la particular “lógica autodestructiva” ugetista– los intentos desesperados por parte de la UGT de llegar a cualquier tipo de acuerdo de mínimos entre diciembre hasta finales de enero. Un proceso negociador que cobraría en la citada ocasión una dimensión dramática. Todo ello con una no desdeñable “novedad” desde un punto de vista organizativo: los primeros síntomas de divisiones internas dentro del propio núcleo de la dirección ejecutiva. Mientras que por parte del Gobierno y de la CEOE y CCOO se afrontaría la falta de acuerdo de una forma para nada traumática, y sabedores de que, en caso de no haber un AI’84, siempre quedaba negociar convenio por convenio.

De esta forma, el efecto más inmediato del *non nato* AI'84 sería un rebrote de la conflictividad. Una conflictividad que bien podría catalogarse como *clásica*. A saber, la salarial, a la que pronto se sumaría una derivada de la reconversión industrial, junto con otra procedente –en términos genéricos– de los efectos acumulados por la crisis económica. Tras el “tranquilo” año anterior, en tan sólo los tres primeros meses del año ochenta y cuatro el considerable incremento de la conflictividad, devendrá en una de las principales causas de preocupación para el Gobierno de cara a asegurar la implantación de su plan de reformas. De ahí, una vez más, saldrán no pocas lecciones para el Gobierno y como veremos para la propia dirección del PSOE. Enseñanzas aprendidas que en muy poco tiempo pondrían en juego. A no más tardar, a mediados de febrero, se llegaría a poner, en la práctica, el *contador a 0* –según su propia perspectiva– con el objetivo de iniciar lo que entonces ya sí se consideró una necesidad política de primer orden: un gran acuerdo social que permitiera al Ejecutivo concluir, con cierto sosiego, su primera legislatura. He aquí la gran lección del *non nato* AI'84.

Mientras tanto, y como ya se ha avanzado, la reforma del mercado de trabajo entraría en un “particular” *proceso de hibernación*. Poco o nada, se hablaría de la misma RET'84 hasta marzo de 1984 en sede parlamentaria, aplazándose y prolongándose todos los plazos legales, hasta que entre junio y julio se aceleraría a toda prisa su tramitación. En los siguientes capítulos se explicarían los porqués de esta *fase de hibernación* parlamentaria, que contrastaría con las “prisas” legislativas de un año antes, a la hora de cerrar el principio de acuerdo entre Trabajo y UGT.

Por el momento, nos detendremos aquí. En primer término, en la intervención del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, en la Comisión de Política Social y de Empleo en el Congreso de los Diputados un 22 de diciembre de 1983. Una fecha clave, donde el *pack legislativo laboral* estaba ya cerrado. Una interesante sesión parlamentaria que antes del parón legislativo de la reforma del mercado de trabajo, en la que vendría a establecer las grandes líneas de actuación de los próximos meses en torno a la RET'84. Relevante, además, ya que también se verterían numerosas críticas por la forma en cómo había transcurrido la negociación de la reforma del mercado de trabajo. Principio y final de una polémica política que nunca dio mucho más de sí, a pesar de su trascendencia. En un segundo lugar, se examinarán los frustrados últimos intentos de alcanzar un AI'84.

No se prodigaría en exceso Joaquín Almunia, a la sazón Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en sus intervenciones en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados durante el primer año de su mandato. Tan sólo dos ocasiones así sería: la del 10 de febrero de 1983²⁶⁸ y la del 22 de diciembre de 1983²⁶⁹.

En esta última ocasión, su intervención llegaba cuando había sido aprobada el conjunto de la reforma del mercado de trabajo por el propio Consejo de Ministros y ya había sido registrada en el Congreso como Proyecto de Ley. Más aún, también se había prorrogado por última vez el RD 1445/1982, a través del RD 3236/1983²⁷⁰. Y, asimismo, por las citadas fechas,

²⁶⁸ CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO, *Acta taquigráfica de la sesión celebrada con asistencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Almunia Amann), quien expuso la política general de su Departamento*, II Legislatura, nº 6, 1983, 10 de febrero de 1983.

²⁶⁹ CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO, *Acta taquigráfica de la sesión celebrada con asistencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Almunia Amann)*, II Legislatura, nº 38, 22 de diciembre de 1983.

²⁷⁰ Real Decreto 3236/1983, de 21 de diciembre, *por el que se prorroga la vigencia de la Sección 1.ª del capítulo II del Real Decreto 1445/1982, de 23 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo* [B.O.E. 31 de diciembre de 1983].

el propio Almunia ya había presentado el proyecto de la RET'84 tanto en el Senado como ante los “prestigiosos” socios de la Asociación para el Progreso de la Dirección²⁷¹.

Con la *fe del converso* prácticamente intacta, el señor Ministro asistiría a la citada Comisión del Congreso con el “objetivo de informar sobre el proceso de concertación social”, y en segundo lugar, “exponer a la Comisión los datos trimestrales [...] [sobre] la evolución del nivel de empleo y paro”. Tres serían los grandes argumentos sobre los que pivotaría su intervención: en primer lugar, la idea de la defensa de una reforma del mercado de trabajo negociada, concertada, y que, supuestamente, había contando con un amplio apoyo de los agentes sociales; en segundo lugar, la *necesidad del giro flexible* en el terreno de lo laboral con todo el discurso *ad hoc* contra la rigidez; y en tercer lugar, la también idea-fuerza del momento oportuno en que llegaba la flexibilización del mercado de trabajo. A saber, justamente, cuando la mayor parte del ajuste económico de la crisis se había producido, y, por tanto, se incrementaría la demanda de puestos de empleo. Quedaba así expuesto y sintetizado, a fin de cuentas, el argumentario del “converso socialista” de la flexibilidad.

Como solía ser en él habitual, Almunia no perdería mucho tiempo en divagaciones ni en largas introducciones. “En concreto, en el marco de esa concertación, realizada básicamente a lo largo del pasado mes de noviembre, se abordó con los interlocutores sociales la reforma del mercado de trabajo”. Añadiendo a continuación:

«Previo a esta regulación legal, pareció conveniente al Gobierno un marco amplio de debates y de negociaciones con los interlocutores sociales para que éstos incorporasen sus alternativas, sus posiciones en todos aquello que pareciese necesario para la mejora de la regulación de estos asuntos».

Tras todo este canto a la paz social, al diálogo y a una concertación social abierta y democrática, que como acabamos de ver en el anterior epígrafe mal casaba con lo que los medios de comunicación, los protagonistas y ciertos documentos venían a contarnos²⁷²; el Ministro de Trabajo, sin pausa ninguna, ofrecería los argumentos de lo que calificaba como una “reforma que necesariamente debía ir en el sentido de una mayor flexibilidad”. Así afirmarí:

«¿Por qué? Porque hemos partido de una serie de constataciones [...] y hemos llegado a la conclusión, en buena parte compartida por los interlocutores sociales, de que, a pesar de que la rigidez con que ha venido funcionado este mercado de trabajo en los últimos años ha sido un elemento negativo que ha dificultado el ajuste a una nueva situación económica, a una situación de crisis, de menor nivel de actividad, una tendencia irresistible casi al aumento del paro y la disminución del nivel de empleo, a pesar de esta rigidez, digo, los ajustes de la mano de obra se han producido ya en muy buena medida».

Planteada, sin tapujos, la *culpabilización de la rigidez*, y prácticamente esbozados en unas cuantas líneas las tres ideas-fuerzas de la RET'84 defendidas con ahínco por parte del

²⁷¹ Noticia, “El Gobierno no intervendrá en la negociación salarial del sector privado para 1984”, *El País*, 16 de diciembre de 1983. Por lo que allí se recoge en aquella noticia, prácticamente Almunia repetiría –en una intervención bajo el título de “Concertación social y relaciones laborales”– el discurso que pronunciaría menos de una semana después en las Cortes. Y, entre los asistentes, a la presentación del segundo del trabajo titulado, “Estudio socio-laboral de la empresa española”, se encontrarían, entre otros, Claudio Boada, Cristina Salas, Emilio Arévalo o Fernando Sánchez Creus.

²⁷² Una defensa de la concertación social que conllevaría a quien se opusiera a la misma, el riesgo de ser tildado de ‘enemigo’. En este sentido, la propia intervención de Manuel Chaves, por parte del GPS, lo dejaría claro, y todo ello con un claro destinatario: «¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Por parte del Gobierno existe esa voluntad de concertar [...] Porque para concertar es necesario la coincidencia de determinadas voluntades, y me da la impresión de que por parte de algunos interlocutores sociales se hacen declaraciones verbales en sentido de que se quiere concertar y que la política de concertación es buena, pero que, después, en la práctica y en la calle se están poniendo todos los instrumentos, todos los medios y todos los obstáculos posibles para que esa política de concertación no llegue a buen término». CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO, *Acta taquigráfica de la sesión celebrada con asistencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Almunia Amann)*, II Legislatura, nº 38, 22 de diciembre de 1983, p. 16.

equipo técnico del Ministerio de Trabajo; se aventura un porvenir positivo con respecto a la futura salida de la crisis económica para 1984. Todo un ejercicio de optimismo económico. O si se prefiere de voluntarismo político estéril, si atendemos a las previsiones del propio PEMP del equipo económico de Boyer. En todo caso, tan sólo cabía una salida posible, una sola posible vía de salida resumida en que, “el camino de la superación de la crisis” pasaba, sí o sí, por “flexibilizar el mercado supone flexibilizar la contratación de modo que los efectos positivos sobre el nivel de empleo de un mayor crecimiento económico se maximicen, se incrementen al máximo”.

No había que ir muy lejos para ver como aquella reforma del mercado de trabajo encajaba con las fases, lógicas y previsiones del proyecto modernizador socialista:

«[U]na perspectiva a corto y medio plazo de reactivación económica, será tanto mayor cuanto menores dificultades, cuantos mayores incentivos, cuanto mayor facilidad haya en nuestro sistema productivo para proceder a nuevas contrataciones y para que el beneficio de un mayor excedente en las empresas, de una mayor capacidad inversora y de una mayor capacidad exportadora; en definitiva, de un mayor crecimiento económico; que ese beneficio se deriva, en el grado máximo posible, hasta el aumento del empleo, hacia el aumento de los puestos de trabajo».

Cerrado el círculo teórico de la lógica modernizadora/liberalizadora y, por ende, de la también *lógica flexibilizadora* socialista, se pasaban a los detalles de la futura RET'84 y a algunas sutiles promesas mezcladas con no pocas dosis de realismo a las que nunca renunciaría Joaquín Almunia, a la hora de destripar sus planes y de hacer balances. Por el lado, de las promesas no se dejaba de reiterar aquello de “distribución del trabajo existente” de larga tradición socialdemócrata; o, bien, por el lado de las realidades, se dejaba constancia de que, “meta del pleno empleo no es una meta alcanzable a corto plazo”.

Y, cómo no, los jóvenes –“colectivo más discriminado en el mercado de trabajo” – ocupaban un lugar destacado. No era para menos, pues en realidad a medio y largo plazo aquel *problema* constituía el más serio reto a afrontar por el propio mercado de trabajo español:

«Todo el mundo es consciente de que una generación entera de jóvenes que no acceda al mercado de trabajo más que en una pequeña proporción es no sólo un problema grave y dramático a corto plazo, sino que es un problema a medio plazo de consecuencias incalculables para el conjunto de la sociedad».

Expuesto el drama, no obstante, lo que allí se venía a proponer como principal solución era de muy escasa *originalidad*. Y añadiríamos, de muy escasa, *utilidad*. Una vez más, los contratos de formación y de prácticas, junto con el contrato de trabajo a tiempo parcial destinado especialmente al colectivo femenino, se presentaban como la casi exclusiva vía de acceso al mercado de trabajo para los colectivos laborales citados. Eso sí con una *novedad* nada desdeñable en tiempos de la ofensiva flexibilizadora: bajo el argumento siempre repetido de lo que se hacía o se dejaba de hacer en Europa.

«En primer lugar, se han revisado [...] las condiciones a través de las cuales se pueden realizar contratos de trabajo en prácticas y para la formación, yendo en el sentido de eliminar trabas, eliminar dificultades y facilitar el que este tipo de contrataciones, que afectan directamente a la población juvenil que busca trabajo, puedan realizarse por nuestras empresas con mayor facilidad que la encontrada hasta ahora».

Que el espíritu reformador socialista iba mucho más allá en esta materia no podía ponerse en duda, a pesar de sus titubeos, recortes programáticos y acuerdos finales alcanzados. Entre flexibilizar y eliminar incertidumbres, también se presentarían alguna que otra propuesta relativamente novedosa. Sin ningún género de dudas, la idea un contrato específico en torno al “lanzamiento de una nueva actividad”, sin mayores precisiones ni detalles por el momento, figuraría como una de las más singulares aportaciones socialistas a la cuestión laboral. Un concepto que provocaría no sólo un amplio rechazo durante el trámite parlamentario, sino que se transformaría –como hemos insistido en páginas previas– en una de las grandes bazas flexibilizadoras del RET'84. Por lo demás, una vez más la honda preocupación del equipo del Ministerio de Trabajo en reducir las “incertidumbres” y en no disminuir las “expectativas de

beneficios” empresariales de cara a asegurar la reactivación de la economía, pesarían notablemente en esta capacidad creativa pro-flexibilización.

Preocupados, además, por el “marco de incertidumbre fuerte” en el que se movía el mercado de trabajo español, se pasaba a presentar la más importante novedad legislativa de la reforma del mercado de trabajo. Con todas las preocupaciones por delante, y con ahora sí matices en torno a los consensos alcanzados —“se ha recibido un apoyo relativamente importante por parte de los interlocutores sociales, aunque con excepciones”— se presentaba como argumento del avance flexibilizador el de, “prever en nuestra legislación una nueva causa con carácter estable, en virtud de la cual se puedan realizar los contratos temporales”. Es decir, se asumía la generalización de la contratación temporal no causal, bajo la metáfora de “una nueva causa con carácter estable”. El poder de la dialéctica socialista gubernamental alcanzaba así una de sus cuotas máximas. En total, para venir a decir lo siguiente:

«Por primera vez en el proyecto de Ley que hemos enviado a la Cámara, y después de las conversaciones mantenidas, se prevé una causa que no está ligada al carácter temporal del trabajo que se va a realizar, sino al carácter inestable de la actividad que se pretende emprender, carácter inestable a lo largo de los primeros años de lanzamiento de nueva actividad».

No faltarían los supuestos argumentos de autoridad para proceder a la descausalización de la contratación temporal: “[e]sta figura está ya recogida en un proyecto de directriz de las Comunidades Europeas relativo a la contratación temporal”²⁷³.

Por si todo lo anterior fuera poco, también se anunciaba la reforma del artículo 17.3 del ET, que autorizaba al Gobierno a regular las medidas de fomento del empleo. El problema, de nuevo, era conocido. La falta de flexibilidad, y por tanto la supuesta preeminencia de rigidez en el SERL. Dicho esto, si algo había demostrado el “proceso” de concertación social era la clara “voluntad de flexibilizar y de regular con menores requisitos y con menores trabas esta autorización excepcional para permitir contrataciones temporales como medida de fomento del empleo”.

Quedaba así definida la filosofía, la estructura, las ideas-fuerzas y los argumentos de la RET’84. El resto de la intervención de Joaquín Almunia giraría en torno a la negativa del Gobierno a facilitar el despido individual y colectivo. Todo ello junto con la propuesta de reforma del artículo 56.4 y del propio Fondo de Garantía Salarial para evitar los fraudes cometidos hasta el momento, en relación a determinados tipos de despido colectivo.

En torno al grado de flexibilidad alcanzada o no se discutiría largo y tendido en aquella sesión de la Comisión Política Social y de Empleo, a pesar de la muy escasa información disponible hasta entonces. Pocos o nulos acuerdos políticos existían en torno a las dimensiones alcanzadas con la RET’84. En cambio, en lo que prácticamente habría unanimidad sería en la denuncia del oscurantismo y secretismo, junto con la falta de documentación, con la que se había llevado a cabo la teórica concertación social. En un tono crispado, con un fuerte entrecruce de acusaciones, la oposición política denunciaría la forma y el proceder del Ejecutivo socialista en aquellos meses. Un conjunto de críticas que, poca o nula, repercusión mediática tendrían. Así por ejemplo, el diputado comunista del Grupo Mixto, Santiago Carillo denunciaba:

«Estamos, si acaso, ante una política de negociación, y yo diría, más bien de posnegociación, es decir, una negociación que se produce sobre la base de planes ya predeterminados por el Gobierno, y muy difíciles de modificar en ningún aspecto importante o esencial».

Recogería el *guante* el diputado entonces del Grupo Centrista, Luis Mardones Sevilla, quien entre en no pocas dudas, decía:

«Pero a renglón seguido me viene una preocupación, señor Ministro, sobre la forma en que se está haciendo esta concertación, lo que usted ha llamado concertación. ¿Ha habido un

²⁷³ Nos remitimos aquí a lo apuntado en la *nota* 202.

documento previo del Gobierno que se ha presentando a las centrales sindicales y a las confederaciones empresariales? ¿Sí o no? ¿Se ha partido de escucharles primero a ellos o ellos han dado respuesta a una primera oferta del Gobierno?».

Expuesto lo anterior, al señor diputado, le surgiría una gran preocupación a continuación: “Ligado con ello, porque me preocupa el cumplimiento de las formas, creo que el Parlamento, las Cortes Generales no pueden encontrarse, en virtud de esa concertación, con un documento inamovible”. Reclamando igualmente: “Quisiera escuchar al señor Ministro algunas palabras tranquilizadoras en este aspecto de las posibilidades de flexibilización de las bases, de los documentos legales, es decir, de los proyectos de Leyes los debates parlamentarios”.

Por su parte, Fernando Suárez González, falangista de pro, profesor de derecho de trabajo y breve Ministro de Trabajo franquista –entre marzo a diciembre de 1975– y diputado del Grupo Popular, tras alegrarse de la progresiva desaparición del “sindicalismo de clase”, no dejaría pasar su intervención para denunciar, en términos graves, la evidente falta de concreción del Joaquín Almunia cuando había venido hablar del alto nivel de acuerdo entre los interlocutores sociales.

«¿Había documentos previos, había actitud del Gobierno, había premisas? ¿Cuál fue la actitud concreta, sincera de cada interlocutor? ¿Quiénes fueron esos interlocutores? ¿Qué sujetos intervinieron?».

Tras indicarle al Ministro que tenía “que reconocer que venir a la Cámara a contarnos lo que leemos en los periódicos resulta, por supuesto, poco adecuado para el interés, el prestigio e incluso la solidez de esta institución”, reclamaría la versión de lo sucedido a los implicados en aquel proceso concertación social –UGT, CCOO y CEOE–; de “quienes intuyo que han tenido algo que ver con todo esto”. En un tono cada vez más crispado, y eso sí con una enorme ironía, señalaría: “Es curioso [...] y me permito llamar la atención, [...] que un Diputado tan cualificado como don Nicolás Redondo, miembro de esta Comisión de Trabajo, no asista a esta sesión y esté en cambio, supongo, presente”²⁷⁴.

A pesar de la inmediata llamada de atención del Presidente de la Comisión –Alejandro Cercas Alonso, para más señas diputado del grupo socialista– a Suárez González, este haría una de las denuncias más claras de lo que entonces todo el mundo daba por supuesto: el *pacto inquebrantable* entre UGT y el Gobierno para no tocar, en adelante, nada de lo pactado en relación a la reforma del mercado de trabajo.

No le faltaría tiempo al Ministro de Trabajo durante su larga replica en contestar a las “acusaciones” de los diputados, en torno a la falta de transparencia en el proceso negociador. Si en la primera intervención Joaquín Almunia había conjugado tanto el verbo “flexibilizar” como “eliminar” en todos sus tiempos verbales, ahora haría lo mismo con el de “concertar”. Todo ello para concluir en respuesta al diputado comunista, que “lo que si ha habido, a diferencia de lo que parecía considerar el señor Carrillo, es una autentica negociación”.

En aquella movida sesión informativa, una vez más, Almunia se comprometería a entregar toda la documentación disponible a petición, en esta ocasión, de Suárez González. Y decimos una vez más, ya que en su momento, a mediados de octubre de 1983, en una situación de atasco de las pre-negociaciones, ofrecería poner a disposición toda la documentación disponible de cara a afianzar la confianza entre los agentes sociales e incentivar la concertación

²⁷⁴ El mismo diputado concluiría su intervención indicando: «Por consiguiente, creo que estoy en mi derecho de decir que estamos poniendo en grave quebranto a las instituciones, porque el Parlamento debe ser, naturalmente, el sitio donde se debatan determinadas cuestiones, y entre ellas el marco de la autonomía de las partes, y si las partes no sólo debate su autonomía, sino que trazan al Parlamento en el marco en que las tienen que dictar, estamos metiéndonos en una vía parlamentaria y legislativa totalmente confusa». CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO, *Acta taquigráfica de la sesión celebrada con asistencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Almunia Amann)*, II Legislatura, nº 38, 22 de diciembre de 1983, p. 13.

social. En esta ocasión, en noviembre de aquel mismo año, tampoco escatimaría en promesas y en el correspondiente gasto de papel oportuno:

«Señor Suárez, estoy dispuesto a proporcionarle todo tipo de documentación, desde las propuestas iniciales a las sucesivas manifestaciones, posturas, ofertas y síntesis que se hayan realizado en todo el proceso de negociación».

Añadiendo una información hasta entonces no conocida:

«Lo que si ha habido desde las propuestas iniciales que el Gobierno formuló sobre la Mesa de conversaciones, con los interlocutores sociales hasta las posiciones finales que el Gobierno ha adoptado en formas de proyectos de ley enviados a esta Cámara, ha sido múltiples cambios, añadidos, supresiones y transformaciones, producidos por una auténtica negociación».

Todavía más. Tras citar a los participantes de aquella negociación –junto con CCOO y UGT y CEPYME y CCOO– también nombraría como participantes a ELA-STV, la Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos. Y, por otro lado, también anunció que se habían tenido conversaciones con UNIPYME. Dicho esto, declararía en un tono menos entusiasta, menos transparente, lo siguiente:

«Los contenidos de lo negociado, por lo menos, se puede comprobar a la luz de cuáles fueron las propuestas iniciales, formuladas en un documento, que no tengo ningún problema en entregar al Presidente de la Comisión para que lo distribuya entre las señoras y señores Diputados, y en los textos finales que quedan ya recogidos en los proyectos de Ley que ustedes van a tener ocasión de debatir».

Consigna nueva aparte fabricada en dicho preciso momento –existió una “auténtica negociación”– desconocemos a día de hoy si aquella documentación, primero, existe, y lo que más importante, se entregó sus señorías. No ha habido forma de localizarla al igual que sucedió con la promesa de octubre de 1983. Lo único cierto es que la polémica parlamentaria por el proceder negociador y la falta de documentación, concluyó allí.

Por lo demás, aquella larga sesión –con muy escasa audiencia en los medios y todavía menor repercusión social– serviría para marcar las diferentes posiciones de cada grupo parlamentario, en una clara división entre la izquierda a la derecha, y viceversa, en relación a la flexibilización del mercado de trabajo. De tal forma, que, de ahí en adelante, las posteriores intervenciones parlamentarias en torno a la reforma del Estatuto de los Trabajadores, en la mayoría de los casos fueran enormemente previsibles.

En este breve recorrido que pretendemos realizar en torno a las posiciones marcadas por los diferentes grupos parlamentarios, cabe resaltar, en primer término, la radical oposición de los comunistas al conjunto de la reforma del mercado de trabajo. En boca del siempre relevante y escuchado orador Santiago Carrillo, dicho *pack reformista* iba a conducir a un “enfrentamiento social cada vez mayor”. No solamente, pues iría más lejos: conduciría a “agudización de la lucha de clases en este país”. Pero es que el proyecto flexibilizador –según el mismo parlamentario– en modo alguno resolvería el problema del desempleo. Antes al contrario a empeorarlo: “[L]a experiencia de estos años [...] demuestra que esa filosofía no es útil para atajar el problema del paro: no ya para llegar al pleno empleo [...] que hoy es una utopía, sino simplemente para reducir el aumento peligroso y desequilibrado del paro obrero”.

No acabó el asunto ahí, pues desde la bancada comunista se desconfiaba de las principales “novedades” del proyecto de RET’84 socialista, empezando, precisamente, por el manido concepto de “lanzamiento de nueva actividad”. “Y todos sabemos –denunciaba Carrillo– que un empresario puede bautizar como nuevos productos, nuevas líneas de producción, etcétera, a viejas líneas y a viejos productos ligeramente modificados”. Un argumento de peso, acompañado de una fuerte crítica final: “Yo creo que la política que ustedes están haciendo no es de izquierdas, es una política liberal-conservadora, una política que podría hacer y que estarían en derecho de hacerla los señores de la derecha”. Concluyendo como tal

orientación estratégica estaba provocando en la “izquierda un sentimiento de frustración del que creo que ustedes comienzan a ser conscientes”²⁷⁵.

Quien más conforme se mostraría en el transcurrir de la citada Comisión, y de forma concreta con el proyecto de reforma, sería el Grupo Parlamentario Centrista. “Respecto a la filosofía general expuesta por el señor Ministro [...] por esa postura del centrismo, de llevar la política laboral a sus coordenadas de realismo, coincido plenamente con la exposición del señor Ministro”, todo ello tras calificar de *realista y pragmática* la RET’84. De tal forma, que según se recorría el espectro político de izquierda a derecha, las intervenciones de los grupos nacionalistas de derechas, de los conservadores y liberales, tendrían en común similares pareceres en torno al grado de flexibilización y especialmente en la crítica de no haber ido más lejos en materia de extinción de contrato de trabajo. O dicho con estas palabras, más claro quedaba la simbiosis entre el discurso empresarial liberal y el discurso político de la derecha con el accionar gubernamental socialista.

En esta tarea, el señor Suárez González siempre se mostraría como un alumno aventajado:

«¿Alguien cree en serio que el sexto Decreto de contratación temporal, o de trabajo en prácticas va a despertar la menor ilusión inversora en nadie en España? Pero si justamente lo que está ocurriendo con esos Decretos es que los empresarios ya no tienen la menor firmeza, la menor seguridad; si ya no saben cuál es la medida que se va adoptar al mes que viene».

Ahora bien, resolver la permanente *incertidumbre empresarial* estaba alcance de Gobierno:

«Claro que hay rigidez en el mercado; claro que hay flexibilidad para nuevas contrataciones. Pero, ¿por qué no se piensa, de una vez, en que una cosa es el absoluto, legítimo y sagrado derecho del trabajador a su puesto de trabajo, mientras el puesto exista y, por consiguiente, la eliminación de toda arbitrariedad en la pérdida de ese puesto de trabajo, y otra cosa distinta es la obligación de mantener el puesto, no al trabajador en él, sino el puesto, aunque no sea de ninguna rentabilidad social ni económica? ¿Por qué no introducimos de verdad en la terminología, para entendernos, las palabras claras, que sepamos de qué estamos hablando?»

Resumiendo. La apuesta por el *despido libre* –sin paliativos– ayudaría de la mejor de las maneras posibles a resolver de una vez por todas el problema del desempleo. La voz, la conciencia de la CEOE no se dejaría de escuchar en aquella Comisión como en el Pleno durante el resto de la legislatura.

En fin, en la citada sesión de más de cuatro horas de duración, el Ministro de Trabajo en todo un ejercicio de responsabilidad y de temple, explicaría los motivos y causas de lo que, en su opinión, había sido una reforma realizada “sin prisas” y con voluntad de estabilidad²⁷⁶.

²⁷⁵ Lógicamente, Joaquín Almunia, negaría la mayor aunque tampoco llegaría a calificar la política socialista como de izquierdas en materia laboral, lo que no dejaba de ser altamente significativo: «[E]l Gobierno actual no está haciendo una política liberal-conservadora, ni la ha hecho en el año que lleva ejerciendo ni tiene ninguna intención de hacerla». Concluyendo: «Otra cosa es que el Gobierno esté afrontando la situación económica, la situación social y otros muchos sectores y ámbitos de la sociedad española y de nuestra realidad con pragmatismo, con realismo, sin demagogia, sin voluntarismos y con afán de resolver los problemas y no de definir en un papel como se debían resolver los mismos». CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO, *Acta taquigráfica de la sesión celebrada con asistencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Almunia Amann)*, II Legislatura, nº 38, 22 de diciembre de 1983, p. 19.

²⁷⁶ Contestando así a una pregunta del diputado Convergente y también miembro de la citada Comisión, Joaquín Xicoy, que no sin ironía denunciaría: «Me parece que esto llega un poco tarde. Me da la impresión de que el Gobierno socialista ha perdido un año, porque los proyectos de Ley se están dibujando al cabo de más de un año de esta legislatura, y no sé cuando se pondrá en práctica, pero en una práctica que se traduzca en realidades, sobre todo en materia de trabajo». CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO, *Acta*

«Queremos que este tipo de cambios legales [...] sean unos cambios legales estables de aquí al futuro; no pretendemos que esta regulación sea transitoria, sino que sea de una sola vez para el futuro, y por ello mucho de los temas que hasta ahora estaban deslegalizados o se regulaban por Decreto los hemos incluido como temas regulados a un nivel legal, que siempre da una mayor garantía de estabilidad. Hemos pensado que, dada la magnitud de estabilidad de esta reforma, merecía la pena estudiarla con tiempo, sin prisas, consultando a los interlocutores sociales, conociendo la realidad de la aplicación de las normas procedentes»²⁷⁷.

El panorama político-sindical no cambiaría, a grandes rasgos, a lo largo de estos meses de *hibernación* de la reforma del Estatuto de los Trabajadores a la par que de negociaciones en torno al *non nato* AI'84. Mientras que lo que sucedía en la calle ganaba peso y atención en términos de realidad social, por el contrario, lo que va a acontecer entre diciembre de 1983 a febrero de 1984 en los despachos serán dos *falsos espejismos* en donde la UGT tendrá un protagonismo central. El primer *falso espejismo* serán los acuerdos de mínimos entre UGT y CCOO de cara, exclusivamente, a la negociación interconfederal, de 1984; y el segundo *espejismo* será la creación de *falsas* como *aparentes* tensiones en las relaciones entre UGT y el Gobierno. En ambos casos, estos *espejismos* tendrán una muy corta duración.

Dentro de UGT la *tranquilidad* y el *sosiego* político eran un valor de escaso uso. Que desde la central socialista se atacara duramente a Comisiones Obreras, y más tras como habían acabado las negociaciones por la futura RET'84, entraba dentro de la lógica instalada desde hacía años. Lógica retroalimentada por numerosas descalificaciones y ataques. Por ejemplo, cuando no había transcurrido ni una semana desde que se aprobara la reforma del mercado de trabajo en el Consejo de Ministros, Redondo denunciaría la política de “agitación por la agitación” de CCOO, que además, a su juicio, llevaban la bandera del “antisocialismo”²⁷⁸. Hasta aquí lo normal, decimos. Pero que en menos de un mes CCOO y UGT llegarán a la elaboración de “plataformas reivindicativas” de cara a la negociación de los convenios colectivos de empresas y sectores en relación a las subidas salariales entre el 8% al 10%, si constituía una cierta novedad.

¿Posible *unidad sindical*? Difícil pues como explicaba a finales de diciembre de 1983 Agustín Moreno –Secretario de Acción Sindical de CCOO–. ¿La razón? Las Comisiones Obreras no estaban por la labor de seguir empobreciendo una negociación colectiva, en tanto en “los contactos mantenidos con UGT y CEOE, estas organizaciones se han mostrado poco dispuestas a negociar otros temas que no sean salariales”²⁷⁹. No obstante, y a pesar de que los ataques entre las cúpulas de los sindicatos prosiguieran su ritmo ya normalizado; que la UGT, siempre más cercana al diálogo pero sobre todo al entendimiento con la CEOE, buscara puntos

taquigráfica de la sesión celebrada con asistencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Almunia Amann), II Legislatura, nº 38, 22 de diciembre de 1983, p. 12.

²⁷⁷ CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO, *Acta taquigráfica de la sesión celebrada con asistencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Almunia Amann), II Legislatura, nº 38, 22 de diciembre de 1983, pp. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 y 20.*

²⁷⁸ Noticia, Alfonso Castro, “Redondo afirma que Comisiones Obreras hace una política antisocialista”, *El País*, 6 de diciembre de 1983. Tan sólo unos días después el propio Secretario General de UGT declaraba: «Marcelino Camacho, nos pedía la unidad de acción sindical y ahora han pasado de ser *hermanos de clase* a ser *enemigos de clase*». Noticia, Javier Ortega, “Las relaciones UGT-Gobierno dejan mucho que se desear, según Redondo”, *El País*, 12 de diciembre de 1983.

²⁷⁹ Noticia, “UGT y CCOO defenderán plataformas de convenio conjuntas en varios sectores”, *El País*, 29 de diciembre de 1983. Tampoco ayudaría, en este sentido, las declaraciones del propio José Luis Corcuera una vez que la negociación del AI naufragara a principios de enero de 1983, y declarara en relación a establecer con CCOO una plataforma conjunta reivindicativa, «salvo [...] que volviera [CCOO] a posiciones de anteriores acuerdos en los que aceptó sacrificios salariales con Gobiernos de derechas». Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE únicamente modificaría su propuesta de incrementos si el Gobierno rectifica su política financiera”, *El País*, 13 de enero de 1984.

de encuentro con los *agitadores* comunistas de UGT, sin duda, era un hecho a valorar. De esta forma, el citado acercamiento basado en unos objetivos concretos modificaría durante un corto tiempo unas envenenadas relaciones. Sin constituir ningún tipo de *unidad de acción*, dicha suma de intereses en pos del poder adquisitivo de los salarios –aunque tampoco los acuerdos fueran mayoría en relación al mismo concepto del poder adquisitivo– llevaría consigo un pequeño conjunto de resultados positivos, que una vez rota la posibilidad de alcanzar un nuevo AI’84, mostrarían, a la postre, el camino de unidad de acción aunque todavía años faltarán para el mismo.

El segundo *falso espejismo* lo constituiría el progresivo distanciamiento dentro de la familia socialista, a pesar de haberse celebrado internamente el acuerdo para la reforma del mercado de trabajo. Veamos, su progresión. De “fraternales” calificaría Redondo –un 11 de diciembre en Zaragoza en el cierre del congreso de Federación de Alimentación y Tabaco de la UGT– las relaciones con el Gobierno, para al mismo tiempo añadir, “positivas, no tanto ni con la fluidez que sería de desear”. El motivo de tal desaliento, los problemas para llegar a una concertación social global como “sinónimo de solidaridad”²⁸⁰.

Para cerrar el año el Ministro Almunia –en una campaña de globos sondas y conspiraciones en la que también iba a participar con evidente entusiasmo Boyer– alentaba las posiciones patronales –muy a pesar de la propia UGT– al afirmar el jueves 29 de diciembre que la “hipótesis *menos mala*” para el Ejecutivo era cerrar un acuerdo en torno al 6,5%. Todo ello a menos de una semana del inicio “oficial” de las negociaciones para el AI’84, que tendría su punto de arranque el 3 de enero de 1984 en el Instituto de Estudios Sociales de Madrid en la calle Pío Baroja, número 6. Unas *paredes* que tantas negociaciones y conspiraciones habían escuchado.

Por cierto, recordaría también el propio Almunia en la cita ocasión como desde los Pactos de la Moncloa por vez primera se negociaba libremente sobre los incrementos salariales. ¿Se convertiría aquella decisión en un “gran error” por parte del Gobierno socialista? ¿Voluntarismo político? En el clásico papel de reparto entre el *político* “bueno” y “malo” a la par que señala que desde el Gobierno no se introduciría un decreto sobre limitación de rentas salariales; advertía de la posible extensión de la conflictividad aunque al mismo tiempo –y con el clásico gesto de prepotencia de los dirigentes socialistas– señalaría de que las movilizaciones de CCOO “no me quitan el sueño”. Y eso que las movilizaciones en Puerto Serrano (Cádiz) o en Sagunto (Valencia) comenzaba a tomar un cariz preocupante en términos de orden público y de violencia política²⁸¹.

Que las relaciones en el seno de la familia socialista comenzaban a “chirriar” de puertas para dentro, e incluso de puertas para afuera, también se estaba tornando en una realidad cada vez más visible, al menos desde agosto/septiembre de 1983. Una *cruda realidad* que los propios interesados querían mantener alejada de los focos televisivos o de las propias redacciones de los diarios. Y, todavía más, de las propias relaciones cotidianas entre Partido-Sindicato y Gobierno-Sindicato.

De este modo, que el diario *El País* en su primera edición dominical del año –recuérdese la más vendida y con mayor repercusión– se hiciera eco a través de un amplio reportaje de los “enfrentamientos” –tal y como allí se decía– entre Gobierno y la UGT, era la señal de que las cosas empezaban a no marchar bien. De ahí a suponer la posible ruptura de la familia socialista todavía resultaba impensable. “UGT y Gobierno socialista, unas relaciones apasionadas”, titularía el cronista laboral de *El País*, Rodolfo Serrano, su amplio reportaje²⁸².

²⁸⁰ Noticia, Javier Ortega, “Las relaciones UGT-Gobierno dejan mucho que se desear, según Redondo”, *El País*, 12 de diciembre de 1983.

²⁸¹ Noticia, “El 6,5% de subida salarial es la solución «menos mala» para Almunia”, *El País*, 30 de diciembre de 1983.

²⁸² Reportaje, Rodolfo Serrano, “UGT y Gobierno socialista, unas relaciones apasionadas”, *El País*, 8 de enero de 1984.

Allí se daba cuenta de cómo en “demasiadas ocasiones los choques entre el sindicato y el Ejecutivo han estado a punto de hacer saltar chispas”. Una expresión quizás demasiado amable, sutil, para lo que no habían dejado de ser enfrentamientos duros a la par que intercambios de favores dentro del *entorno* de la familia socialista.

Así Rodolfo Serrano describiría en aquel reportaje dividido en dos piezas –la segunda, la titularía, “Días de vino y rosas” sobre la que ya hicimos referencia en su momento– tres de los grandes conflictos que habían tensado las relaciones entre sindicato y Gobierno. Relaciones siempre marcadas por un *tira y afloja* por parte del Ejecutivo, en lo referido a su orientación liberal en materias sensibles vinculadas al mundo del trabajo. El primer conflicto importante se habría derivado de la propia ruptura de los acuerdos a la hora de aplicar la Ley de la jornada de 40 horas tras negociarse el AI’83. Un segundo conflicto, se desataría por las filtraciones de destacados miembros del equipo económico del Gobierno en relación a posible flexibilización radical del mercado de trabajo, sin excluir el despido libre durante el verano de 1983. Aquí el propio Serrano llegaría afirmar: “Se rumoreaba que todas las filtraciones de proyectos de filtración del mercado de trabajo salían del Ministerio de Economía, cuyos responsables defendían a ultranza la necesidad de un nuevo marco de relaciones laborales”. El tercer gran conflicto se produciría a causa de la Ley de Reconversión Industrial, en donde la UGT se sentiría traicionada, y la obligaría a un tremendo esfuerzo para que sus tantas veces pregonada *política de solidaridad* no se fuera al traste, tras el cierre de la mesa de negociación y las posteriores conspiraciones y encuentros bilaterales, a través de los cuales la central socialista conseguiría *arreglar* el asunto.

Pero más allá de este reportaje, junto con todo lo anteriormente apuntado, qué nos enseña este peculiar sistema de mutuas relaciones en el seno de la familia socialista, después de poco más de un año en el poder. En lo básico, tres cuestiones. Primero, la práctica de resolver las divergencias, los enfrentamientos, de puertas para dentro a través de acuerdos secretos que se saltarían todos los requisitos y formalidades de lo que hoy se entiende por concertación social. Segundo, los acuerdos, pactos y políticas de no enfrentamiento abierto entre Ejecutivo y el Sindicato se consiguen a través de un complejo proceso de cesiones y de favores, que rompe con la idea del modelo socialdemócrata de estrategia unitaria socialista²⁸³. Un modelo de difícil concreción para el caso español, si se cae en la *tentación* de interpretar este tiempo a base a esquemas teóricos puros; o directamente cuando se pretende leer la política económica del Gobierno socialista como una política socialdemócrata. Y en tercer lugar, lo que se terminaría por evidenciar a través de todos estos conflictos, mayores o menores, era el progresivo deterioro de las relaciones personales de los “antiguos” compañeros socialistas. Cuando no se percibía claros signos de desprecio entre los propios militantes socialistas²⁸⁴.

Nuevamente, en los pequeños detalles se podía encontrar aquello que Manuel Vázquez Montalbán llamara la “proteína pura de la verdad histórica”. Así, por ejemplo, el hecho de que el antiguo asesor de UGT, Joaquín Almunia, fuera “recibido en congresos ugetistas entre el silencio y el murmullo”, era un dato a tener presente. Como también había que tener en cuenta la constatación de la pérdida gradual de Redondo de su capacidad de influencia, de presión dentro del PSOE, del GPS o directamente frente al propio Presidente del Gobierno. Un distanciamiento, a fuerza de golpes con la realidad política, que tendría otra traducción para el seno de la Ejecutiva Confederal de UGT en menos tiempo del esperado: el *papel subsidiario*, de mero acompañante, de la UGT dentro del proyecto modernizador socialista. Sí, lo que, sin ambigüedades, Alfonso Guerra denominara el papel instrumental que tanto desde el Partido como desde el Gobierno se había dado a la UGT dentro del proyecto de la modernización

²⁸³ Véanse aquí las tesis mantenidas por, ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, *op.cit.*.

²⁸⁴ «Las críticas de UGT fueron duras [...]. Y en las comidas privadas, los principales líderes llegaban a comentar entre sonrisas, al periodista amigo ‘Listillos y *progres* que son esos chicos que en su vida han estado en una fábrica y que no han salido jamás de un despacho». Nicolás Redondo en declaraciones a, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, *Historia, memoria y...*, *op.cit.*.

socialista²⁸⁵. Una idea que se convertiría en un principio de realidad en el trance final del *non nato* AI'84.

Pasado el duro trago de la negociación y la todavía más complicada reunión extraordinaria de su Comité Confederal a finales del mes de noviembre, la UGT se mostraría mucho más combativa –al menos en público y ante los medios y sus potenciales aliados– en lo referente a la cuestión de las bandas salariales para 1984. Como había sucedido en años anteriores el principal punto de desencuentro se limitaba, en la práctica, a establecer una banda salarial que en este caso presentaba las siguientes características²⁸⁶: con una inflación prevista del 8%, el Gobierno apostaba ya claramente por “orientarla” en el 6,5% en el sector privado –y decimos “orientarla” ya que al ejecutivo renunciaría a intervenir en tal negociación– una vez que había fijado tal porcentaje para el sector público en los PGE.

La defensa de este nuevo sacrificio –que nadie en el Ejecutivo y en sus proximidades quería denominar “pérdida de poder adquisitivo” por razones obvias– alcanzaría una notable intensidad entre la segunda mitad de diciembre de 1983 y la primera mitad de enero de 1984²⁸⁷; CCOO se negaba rotundamente a que los trabajadores seguirían perdiendo poder adquisitivo y así planteaba un 10% de subida salarial, que permitiera recuperar algo del terreno perdido en capacidad adquisitiva; la CEOE, por su parte, proponía negociar por debajo de las previsiones del Gobierno; y finalmente la UGT adoptaría una posición intermedia: el 8%. La enésima vuelta al *ruedo público* no depararía grandes sorpresas.

Tras defender los principales dirigentes ugetistas –entre otros, José María Zufiaur o José Luis Corcuera, con Nicolás Redondo a la cabeza– a capa y *espada* los “logros” y “avances” sociales y sindicales que había supuesto la negociación del *pack legislativo* acordado con Trabajo²⁸⁸; tocaría, de ahí al final del año, en no ceder al cansancio acumulado tras toda la negociación y dar la batalla tanto por la negociación salarial como por la reconversión industrial. Especialmente tenaz se mostraría en la cuestión salarial, pues como se ha repetido en numerosas ocasiones lo que se jugaba era, ni más ni menos, que poner en práctica sus tesis congresuales. En cualquier caso, aquella propuesta del 8% venía previamente matizada por varias cuestiones. Primero, por el hecho de dar por buena las previsiones gubernamentales; y en segundo lugar por mostrarse flexible en negociar a la baja si se aseguraba entre el 6% al 6,5%. En fin, un ejemplo más del clásico pragmatismo ugetista.

Bajo estas pobres bases que definían, en la práctica, a la concertación social en un tiempo todavía de transiciones, se cerraría el año sin acuerdo ninguno. En todo caso, no sería por falta de reuniones, de declaraciones altisonantes y todos los intentos de *acuerdos por arriba* posibles e imaginables.

Por cierto, hablando de *acuerdos por arriba* por parte de la Ejecutiva de UGT se volcaría plenamente a lo largo del mes de diciembre –dejando, de hecho, en un plano

²⁸⁵ Véase lo apuntado en el Capítulo 7, *nota* 431.

²⁸⁶ Un estado de la cuestión para mediados de diciembre de 1983 en, Noticia, Rodolfo Serrano, “La concertación colectiva, pendientes de la mesa de concertación sobre temas fiscales”, *El País*, 12 de diciembre de 1983.

²⁸⁷ No faltarían las promesas como la expresada por el secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando en el Congreso de los Diputados señalaba que tan sólo creciendo los salarios al 6,5% podría crearse empleo. Noticia, “El empleo crecerá si se respeta el 6,5% de aumento salarial, según el Gobierno”, *El País*, 14 de diciembre de 1983.

²⁸⁸ «Respecto a los acuerdos alcanzados en la mesa de empleo con el Ministerio de Trabajo, José María Zufiaur explicó que en las tres áreas tratadas –cobertura de desempleo, contratación temporal y Ley Orgánica de Libertad Sindical– se había dado un paso hacia delante y en todos los casos la nueva situación es mejor que la existente». Extraído de, Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT defenderá un 8% de incremento como referencia en las subidas salariales”, *El País* 26 de noviembre de 1983.

secundario la preparación de las negociaciones del AI'84– en darle la vuelta al Real Decreto-Ley 8/1983, de 30 de noviembre, de *Reconversión y Reindustrialización* y en concreto al artículo 22, relacionado con los excedentes de plantilla. Sin renunciar a seguir incorporando de “manera definitiva las posiciones de UGT en los aspectos que no coincidimos con el Proyecto de Ley de Libertad Sindical”; como decíamos en la primera reunión de la CEC tras el Consejo de Ministros del 30 de noviembre, que tendría lugar el 6 de diciembre, se diseñaría toda una amplia estrategia de cara a regular por “Ley, las rescisiones del contrato de trabajo para aquellos trabajadores que sean excedentes en sectores o empresas que entren en los planes de Reconversión Industrial”.

Con el fin de evitar lo que parecía inevitable, no sólo se elaboraría un “texto alternativo”, sino que se solicitaría una reunión con la CEF del PSOE y otra con el GPS por parte de los parlamentarios socialistas con Chaves a la cabeza. Y avisando: “Si a pesar de estos esfuerzos que se están realizando el Gobierno no cambia su actual posición, la UGT se verá obligada a convocar las movilizaciones que se estimen oportunas, en los sectores afectados por dicha Ley”²⁸⁹. Subrayada la amenaza, no se podía dudar de la misma, al menos, en este terreno.

Después de la reunión que el día 9 se tendría con las Federaciones del Metal de UGT²⁹⁰, se sucedería un tenso encuentro con la Ejecutiva socialista el martes 13: “Dicha reunión valorada como muy positiva, por cuanto que la CEF del PSOE recogió nuestros planteamientos sobre dichos problemas”, se señalaba en la correspondiente acta de la Ejecutiva del 20 de diciembre²⁹¹. A la que seguiría el *informe* de otra reunión con Industria en donde se también conseguiría, finalmente, modificar el dichoso artículo 22²⁹². Después de lo cual, y una vez reunidos con el GPS, se daría por cerrado un grave problema, que otra vez tensaría enormemente las relaciones dentro de la familia socialista²⁹³.

De nuevo, se había evidenciado la capacidad de UGT de *tensar* pero *sin romper* las relaciones familiares entre Partido, Gobierno e incluido aquí también el Grupo Parlamentario Socialista, y de resolver el problema con tres reuniones. Una estrategia que en dicho caso daría sus frutos, y que mostraba lo mucho que se podía “ganar” a través de un modelo de negociación “no público” como “familiar”, aunque el coste fuera una deslegitimación política de Solchaga, quien por aquellas alturas ya pensaba dimitir²⁹⁴. Un hecho que sucedería a no más tardar en febrero casi al mismo tiempo en que se publicaría el Real Decreto 335/1984, de 8 de febrero, *por el que se regulan los fondos de promoción de empleo*²⁹⁵. Visto lo anterior, ¿se trasladaría tal proceder negociador al futuro marco en que tendría que resolverse y acordarse el AI'84?

A menos de cuatro días de que expirará el AI'83, UGT y CEOE se reunían para tantearse mutuamente acerca de un posible Acuerdo Interconfederal de 1984. Sin ser una de las habituales reuniones secretas, la noticia sería filtrada por EFE y publicada en numerosos

²⁸⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 15. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 6 de diciembre de 1983”, sig. 002251-003.

²⁹⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 16. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 13 de diciembre de 1983”, sig. 002251-003.

²⁹¹ Un resumen, con álbum fotográfico incluido, de la reunión clave que iba a desatascar el citado problema en: “La reconversión industrial, adelante”, *Unión*, nº 45, (1984), p. 5.

²⁹² AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 17. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 20 de diciembre de 1983”, sig. 002251-003.

²⁹³ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 18. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 28 de diciembre de 1983”, sig. 002251-003.

²⁹⁴ Véase lo apuntado al respecto en el Capítulo 7, *nota 162*.

²⁹⁵ Real Decreto 335/1984, de 8 de febrero, *por el que se regulan los fondos de promoción de empleo* [B.O.E. 21 de febrero de 1984].

medios, entre ellos, *El País*²⁹⁶. Una reunión sin mayor trascendencia en lo operativo, pero que dejaba, una vez más, expuesta las prioridades de la UGT de alcanzar al coste que fuera un acuerdo salarial, con o sin el concurso de CCOO. Todo ello, a pesar de que el mismo 28 de diciembre, UGT y CCOO llegarán a uno de los escasos acuerdos durante la primera legislatura de la época socialista para defender, a través de plataformas conjuntas, posiciones comunes de cara a la negociación colectiva, tal y como ya se ha dicho²⁹⁷.

Inaugurado el año sin que ninguno de los protagonistas hubiera mostrado síntomas de ceder o de flexibilizar sus posiciones, se celebrarían dos reuniones “oficiales” en los primeros días de mil novecientos ochenta y cuatro. En medios periodísticos cercanos al poder –*El País* o los diarios económicos de aquellos años– daban casi por seguro un Acuerdo Interconfederal similar al del año anterior, a pesar de todas las distancias entre los agentes sociales que se habían ido marcando en los meses anteriores. “[P]arece muy probable que las negociaciones se desarrollen con fluidez y se llegue a un acuerdo entre las partes” se podía leer en la crónica laboral de *El País* el mismo día del inicio de las conversaciones el martes 3 de febrero. Una lectura singular, pues en el mismo momento en que se profundizaba en dicha crónica ni CEOE ni CCOO estaban por la labor de ceder en sus postulados iniciales, aunque mucho más flexible y pragmática se mostraba la UGT, para quien lo,

«conseguido hasta hora en las negociaciones con el Gobierno –cobertura de paro, contratación, ley de libertades sindicales–, a juicio de la central socialista [constituye una] contrapartida suficiente que permite subidas inferiores al 8%. La negociación colectiva, para UGT, no debe tener un componente exclusivamente económico»²⁹⁸.

En este panorama tan escasamente alentador daba, pues, inicio una vez más al gran teatro de la política de la negociación. El resultado de la primera reunión celebrada aquel mismo 3 de enero sería nulo en términos prácticos. La vieja historia se repetía, tal y como había sucedido en todas y cada una de las negociaciones desarrolladas desde la transición sindical: ninguno de los agentes se movía de sus posiciones de partida. Y menos a la primera de cambio. Mientras que CCOO aparecía como el elemento radical –“CCOO es la organización que plantea mayores dificultades para lograr un acuerdo interconfederal-1984” se podía leer en la crónica laboral de aquel día–; UGT y CEOE se mostraban cercanas a alcanzar un acuerdo. En todo caso, resultaba patente como la patronal se mostraba cómoda, nuevamente, con aquella negociación, en tanto no había tenido que moverse de sus posiciones de partida; la UGT mostraba la posibilidad de modificar su posición de partida en torno al 8%, una vez que ambos agentes compartían las hipótesis económicas del Gobierno, lo que sin duda ya era una coincidencia mayor a considerar.

Llegados aquí también no había que ser muy astutos para comprender como al aceptar tales previsiones, la UGT se auto-debilitaría a corto-medio plazo a sí misma en tal proceso. A ello se sumaría otro factor clave que denunciara tiempo más tarde el propio Redondo, y que ponía entredicho las relaciones familiares socialistas así como cierta connivencia con la CEOE por parte del Ejecutivo en otro claro gesto de la falta de interés en llegar a un acuerdo interconfederal en dicho año, con el afán de asegurarse su objetivo de *moderación salarial*.

«El año 1984 se llevó a cabo una política de ajuste duro, una política que se puede calificar de monetarista. Y, como política monetarista, era autoritaria, con poco espacio para la negociación. Se trataba de conseguir crecimientos sociales muy bajos. Y el Gobierno no se recató en dar orientaciones a la CEOE. A los empresarios se les hizo llegar una referencia sobre el crecimiento de la inflación mensual. Suficiente para que se agarraran aquello y dijeran: ‘Si las cosas son así, mi ofrecimiento no pasará de este punto’ [...]. Fue una política muy medida, y yo

²⁹⁶ Noticia, “UGT y CEOE inician las reuniones para el acuerdo marco de 1984”, *El País*, 28 de diciembre de 1983.

²⁹⁷ Véase lo apuntado en la *nota 279*.

²⁹⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los sindicatos exigen una banda salarial que recoge el 8% de inflación prevista”, *El País*, 3 de enero de 1984.

creo que en aquel momento el Gobierno, una parte del Gobierno, quiso cogernos en una pinza entre ellos y la CEOE»²⁹⁹.

Se repetía, pues, la misma representación aunque con una *nueva* variable a tener presente como acabamos de observar, por más que tanto a las declaraciones de Almunia como a las filtraciones de Boyer no se les diera la relevancia oportuna en su momento. De hecho, desde Comisiones Obreras se denunciaría un “preacuerdo entre la central socialista y la CEOE”. No erraba como se puede entrever por las actas de la CEC de UGT, aunque sus pronósticos fallarían en dicha ocasión. Así en el propio *El País* –citando fuentes de confianza– se indicaba que “el acuerdo puede producirse con carácter inmediato”. Añadiendo como se “llegó a afirmar que el próximo día 12 pudieran darse por concluidas las negociaciones”³⁰⁰.

Tal era la hipótesis de trabajo de la Ejecutiva de la CEC que se trazaría en su reunión del martes 10 de enero. Con la vista puesta para llegar a un “principio de acuerdo” que se pudiera debatir en el primer Comité Confederal ordinario tras el XXXIII Congreso, convocado para los días 13 y 14, se tomarían tres relevantes decisiones: primero, *marginar* a CCOO en la práctica; segundo “hacer las gestiones oportunas, tanto con la CEOE, como con el propio Presidente del Gobierno con el fin de que dicha alternativa sea visible y llegar a un principio de acuerdo en la reunión prevista para el día 12”; y tercera, modificar a toda prisa su estrategia de partida, de cara a una flexibilización de sus posturas iniciales, basadas ahora en una propuesta de “banda salarial del 6% al 8%, incluyendo la revisión salarial correspondiente, de igual forma a la que se negoció en 1983”³⁰¹.

De esta forma, y hasta la siguiente reunión –prevista para el 12 de enero– se repetiría también aquí una misma historia que también hemos visto en más de una ocasión: un apagón informativo por parte del principal diario de la nación, y ello a pesar de que no faltarían las reuniones de trabajo y las declaraciones oportunas.

“Rotas las negociaciones del Acuerdo Interconfederal para las subidas salariales de 1984”, anunciaba el mismo periódico –el *El País*– un viernes 13 de enero, cuando no hacía ni diez días que se había dado por hecho el acuerdo en más de una ocasión. La razón: ahora ninguna de las partes daba a torcer sus puntos de partida, ni siquiera la solícita UGT tras la segunda reunión oficial. Se anunciaría, de hecho, “formalmente” la ruptura de las negociaciones, aunque no su *ruptura oficial y definitiva*, en esa siempre búsqueda de matices lingüísticos. Daba inicio la teatralización de un nuevo drama que en escasos días alcanzaría cuotas extravagantes. Y ello con una relevante novedad: pues tal negociación tan sólo tendría

²⁹⁹ Declaraciones de Nicolás Redondo a, GUINDAL, Mariano y SERRANO, Rodolfo, *La otra transición...*, op.cit., p. 151. De hecho, y como advirtiera Javier Astudillo, el «propio Carlos Ferrer llegó a insinuar que fue el propio ministro de Economía quien les había recomendado que no firmasen un acuerdo con el contenido propuesto por UGT». ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, op.cit., p. 196, nota 196. Por parte Agustín Moreno, de CCOO, señalaría: «[N]o cumplió su compromiso de abrir una negociación sobre los temas estructurales de fondo que interesaban a los sindicatos [...]. En el año 84 demostró que no tenía ninguna voluntad de llegar a acuerdos en nada, ni en salarios ni en ninguna otra cosa, es decir, tuvo una actitud abiertamente contraria a todo tipo de concertación, negociación social y acuerdo». Declaraciones extraídas de, OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit..

³⁰⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “CCOO plantea posturas dispares en la primera reunión para el acuerdo salarial de 1984”, *El País*, 4 de enero de 1984. Véase también, “Las subidas salariales no superarán el 8 por 100”, *El Socialista*, nº 344, (1983), p. 29. En el interregno de los días siguientes se comenzarían a conocer los primeros datos oficiosos de los efectos del AI’83. Con una banda salarial establecida entre el 9,5% al 12% finalmente la subida salarial media se situaría a nivel de convenios colectivos en el 11,50%. En 1983 la inflación final sería del 12,3%. Es decir, una vez más el conjunto de la población asalariada perdería poder adquisitivo. Datos extraídos: Noticia, “El incremento salarial medio en 1983 fue del 11,50% según datos de Trabajo”, *El País*, 10 de enero de 1984.

³⁰¹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 19. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 10 de enero de 1984”, sig. 002251-003.

dos reuniones públicas y oficiales. Otro nuevo *record* a sumar en el haber de los procesos negociadores de la concertación social en la época socialista.

Por su parte, la CEOE no cerraba del todo las negociaciones. Sin mostrarse dispuesta a modificar su banda salarial –del 5,5% al 7,5%– ofrecía la alternativa de “incluir una cláusula que permitiera que a nivel de los convenios de empresa pudiera llegarse al 8%”. Pero tal *renuncia* tras tantos meses defendiendo dicha hipótesis, venía acompañada de una condición político-económica de no poco alcance: “si el Gobierno modificara su política financiera”³⁰². Una vez más, la CEOE, por tanto, manejaría hábilmente los tiempos políticos, a la par que leería correctamente la situación político-social, y, por tanto, marcaría un tanto en la capacidad de iniciativa política. También hay que decirlo no le faltarían “aliados” esperados o inesperados en esta política, que bien puede definirse como de *chantaje* en una situación de profunda crisis económica. Así el mismo día en que daban por *rotas* la negociación del AI’84, *El País* publicaba un amplio editorial que venía a sustentar la tesis del equipo económico del Gobierno a la par que el de la propia CEOE:

«En estas circunstancias, si no se produce también en el sector privado una moderación coherente en las alzas salariales –incluso en sector productivos y en empresas concretas capaces de mejorar los índices deseados por el Gobierno–, cualquier proyecto de inversión se irá al garete, y con ello, la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo y un crecimiento económico que inicie el relanzamiento».

Concordante, punto por punto, con la tesis del equipo económico del Gobierno, el mismo editorial no perdía la ocasión en *culpabilizar directamente* a las subidas salariales de la crisis económica en su conjunto:

«En definitiva, en España, como ha sucedido en casi toda Europa, los incrementos salariales, los aumentos por cualificación y antigüedad en el puesto de trabajo, así como otros costes extrasalariales, han tenido una influencia decisiva en la caída del empleo y en el aumento del paro».

Todo un mensaje en un momento en que fracasada, de forma parcial y no definitiva, la negociación del AI’84, su más cercana consecuencia sería un “proceso de tensiones y forcejeos que cristalizan en huelgas o cierres patronales”, según el mismo diario³⁰³.

En este panorama de “práctica ruptura” oficiosa, se reuniría por fin el I Comité Confederal ordinario de la UGT. En realidad, para la Ejecutiva ugetista no podía llegar en peor momento la reunión tantas veces aplazada, inclusive a fuerza de saltarse los Estatutos.

Como siempre Nicolás Redondo abriría el mismo presentando el correspondiente *informe de gestión*: “Han transcurrido más de seis meses de gestión en una etapa especialmente difícil para los trabajadores”, comenzaría afirmando. Para afirmar a continuación sin ninguna duda: “Nosotros hemos definido con absoluta nitidez cuál es el modelo sindical que proponemos”. Por más que se resaltara como “nos hemos equivocado muchas veces”, el trayecto recorrido aparecía positivo a todas luces. Defendida la “bandera de la solidaridad” como un signo de *sensatez*, apenas aparecían mayores críticas. Para empezar, el AI’83 había sido un éxito. No sólo, pues, se había asegurado “el mantenimiento del poder adquisitivo de los salario”, quedando demostrado el acierto en la defensa de la tesis del *salario global*, por más que cuando eso ocurriera no hubiera tenido lugar aún el 33º Congreso de la UGT.

³⁰² Noticia, Rodolfo Serrano, “Rotas las negociaciones del Acuerdo Interconfederal para las subidas salariales de 1984”, *El País*, 13 de enero de 1984. En una ampliación nota informativa en torno a la decisión de la patronal, el mismo periodista informaba de lo siguiente: «La decisión de la CEOE, utilizando negociaciones como forma de presión, se basa en la escasez de recursos que el crecimiento del gasto público deja al sector privado». Y concluía aquella pieza: «Y un representante empresarial mostraba ayer su temor de que la central socialista se viera obligada a sumarse a la conflictividad que previsiblemente habría de desencadenarse». Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE únicamente modificará su propuesta de incrementos si el Gobierno rectifica su política financiera”, *El País*, 13 de enero de 1984.

³⁰³ Editorial, “Los límites del salario y los límites al empleo”, *El País*, 13 de enero de 1984.

Y, una vez más, sin apenas críticas visibles o no visibles contra la CEOE, se volvería a cargar contra el *peligro radical* de CCOO, lo que pasaba por evitar el intento de instrumentalización por parte del PCE, de quien se hacía un completo balance tras su XI Congreso, para señalar: “Hemos dicho que no nos interesa un estado de crisis permanente en el PCE, pues el sistema de partidos reclama la consolidación de una fuerza comunista con clara identidad”. En cuanto a la relación con el Ejecutivo no se dudaba en hablar de “cierta complejidad”, y de cómo las mismas habían “atravesado momentos especialmente tensos”. Más aún: “Ha sido difícil encontrar el nivel adecuado para que estas relaciones transcurran con normalidad y lograr el pleno reconocimiento de la Unión como interlocutor necesario y válido para la negociación de los grandes temas de la política económica y laboral”. Así pues, tocaba volver a readaptarse a los “principios de realidad” a la par que hacerlos compatibles con los “fines perseguidos”, que no eran otros que una “más justa, superadora de la sociedad capitalista”.

Retóricas anticapitalistas aparte, la estrategia a marcar pasaba por los mismos postulados. Pese a los “desacuerdos” habidos, no se cuestionaba en momento y de forma alguna el apoyo cerrado al Ejecutivo, por más que pudieran surgir “enfrentamientos parciales”. “[N]adie debe confundir lo que es una crítica positiva con una actitud obstruccionista”, se matizaría, para seguir defendiendo sin tapujos la política de concertación y los correspondientes sacrificios.

Pero yendo a lo relevante, por primera vez y pese a lo dicho en público y lo resaltado en más de una ocasión en las reuniones de la Ejecutiva, se reconocería como en “la elaboración de los PGE de 1983 no fuimos consultados, pese a nuestras demandas, en los aspectos con clara incidencia en el mundo del trabajo”. Asimismo se reconocería –en otro gesto de autocrítica inusual aunque destinada para consumo interno en la práctica– como en lo relativo a los PGE de 1984 tan sólo serían “oídos”, por más que se defendieran como *éxitos* propios la introducción de toda una serie de partidas sociales³⁰⁴.

Si en la reunión de noviembre el apoyo al *pack reformista* del mercado de trabajo, junto con el método de negociación, no había levantado demasiadas ampollas, se hacía imprescindible dar una explicación coherente pero sobre todo más detallada al respecto. No se dudaría en calificar como tal negociación había conllevado “las más importantes discrepancias con los puntos de partida del Gobierno”, ante las diferentes declaraciones por parte del Presidente y de diferentes ministros, en lo que se interpretaría como un “posible abandono a los principios definidos en el Programa Socialista”. Hasta ahí llegarían las posibles críticas. Correspondía, en adelante, amparar los criterios ugetistas al respecto –por más que en realidad todo estuviera pactado y vuelto a pactar– que pasaban por defender el *contrato indefinido*, lo que se denominaba como la “contratación temporal objetiva” y la todavía más extraña figura de la “contratación temporal subjetiva”. Y aunque el citado *informe* no se prodigaba en mayores detalles ni comentarios sobre las excepciones pertinentes o directamente sobre la realidad laboral futura que implicaría la RET’84, pareciera que la UGT había conseguido una reforma limitada, en lo que no dejaba de ser, en verdad, una clara interpretación sesgada. Tan sesgada que de atenernos a lo que se explicaba en dichas páginas, pareciera que el Gobierno se había mantenido fiel al programa electoral de 1984. Nada más lejos de la realidad. Más prolíficos en detalles se mostraría, sin ir más lejos, en las consecuencias que acarrearía la futura Ley 31/1984.

Igualmente con enorme pericia discursiva se evitaría profundizar en los pormenores que habían conllevado las negociaciones del proceso de reindustrialización. De “delicado asunto”, se calificaría para a continuación *atacar* a CCOO –a quien se la tildaría de

³⁰⁴ Por otro lado, a nivel externo, entre los afiliados y posibles simpatizantes no se tendría pudor en afirmar como los PGE para 1984 se había convertido en la más valiosa arma para «proteger a las clases más necesitadas». Y se mencionada lo anterior al albur de un repaso por el primer año del Gobierno socialista, en donde se evitaban tratar, entre otras cuestiones espinosas, como la RET’84. “Ya va un año”, *Unión*, nº 45, (1984), pp. 1, 3-4.

“demagógica e irresponsable”– y explicar, en suma, resultados obtenidos. En cualquier caso, no se daban por cerradas las “cuestiones más importantes”, así como no se hacía aconsejable, por tanto, “emitir una valoración final” del citado “marco normativo”. Asimismo se dejaría también constancia de las duras como complicadas negociaciones en diciembre en relación al artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/1983. Repasadas como otros evidentes éxitos la LOLS o la cuestión del patrimonio sindical, en unas pocas líneas se resolvería el engorroso problema de explicar lo que se calificaría como una “auténtica torpeza técnica”, en relación a las *Instrucciones* dadas por Trabajo en relación al cumplimiento de la Ley de las 40 horas³⁰⁵.

Para completar tal alentador cuadro, se pasaría, igualmente, revista a la situación crítica del proceso de negociación colectiva, en donde se incluirían frases tan significativas como las siguientes, teniendo presente lo que la UGT había pactado previamente con la CEOE: ante las dificultades existentes para llegar a un AI’84 se habla de los riesgos provocados por “la actitud de sectores interesados en potenciar la negociación «libre» sin compromiso de referencia”; lógicamente, en el reparto de las culpas aparecía –como no podría ser de otra forma– la “indefinición [de CCOO] sobre el nivel de las negociaciones, y no expresa con claridad sus reivindicaciones salariales”. Con ser *grave* como *falsa* la anterior acusación, se continuaría con la habitual táctica discursiva de desvío obligado de atención, al centrar todas las responsabilidades de un posible fracaso ante la actitud que adoptara Comisiones Obreras:

«No puedo menos que calificar de preocupante la actitud de la otra central representativa. CCOO parece lanzada a un proceso que la retrotrae a un radicalismo más propio de etapas de lucha antidictatoriales que de una etapa, como la que vivimos de un Gobierno socialista que lucha por superar la crisis desde la solidaridad y profundizar la democracia»³⁰⁶.

Convertida, de esta manera, Comisiones Obreras en el gran enemigo a batir –en donde se llegaría a descalificar su actitud ante la reforma de los contratos temporales, que se llegaba a calificar como “mucho mejor que la conseguida en el ANE con su firma”– y calificados sus posiciones de sectarias, se la responsabilizaría, además, de cómo había hecho “imposible acuerdos mínimos para abordar las negociaciones con el Gobierno y la patronal”. Tras otros tantos improperios, descalificaciones e insultos, se afirmaba como hasta ahí se había llegado cualquier posible relación con CCOO:

«Creo que el lenguaje y la conducta dual de CCOO han alcanzado sus límites. No permitiremos que bajo continuas invocaciones a la unidad, se encubra en práctica agresiva, insultante y de mala fe contra la UGT en los centros de trabajo»³⁰⁷.

Visualizado el *oponente*, realizados los llamamientos a la unidad de la organización y dada la correspondiente explicación sobre la actuación de la UGT en las diferentes mesas de concertación, vendría el denominado “turno de críticas”. Y, una vez más, lo cierto, es que la

³⁰⁵ Más ampliamente se trataría la citada cuestión en: AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Acción Institucional, “Informe de Gestión que presenta la Secretaria de Acción Institucional al I Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 13 y 14 de enero de 1984, sig. 002606-002.

³⁰⁶ En un enigmático artículo de Nicolás Redondo, pero sobre todo poco clarificador, y bajo el título, “¿Por qué ahora no?” que abría un número de *Unión* por aquellas fechas. El Secretario General de UGT lanzaría un duro como gratuito ataque contra Comisiones Obreras, justo cuando se estaban negociando posibles *plataformas* conjuntas de cara al AI’84. Repitiendo todos los argumentos tantas veces expuestos –junto con las correspondientes falacias que los solían acompañar– planteaba como un desastre total todas las movilizaciones del PCE-CCOO en tono de agresividad desconocido, incluso para el propio Redondo. Todo ello para concluir con la defensa del sindicalismo responsable y negociador: «Vamos a seguir trabajando, invitando en todo momento a los compañeros a buscar acuerdo entre todos; unos acuerdos sensatos que den viabilidad a la búsqueda de soluciones necesarias y lógicas en beneficio de todos los trabajadores de este país, muchos de los cuales han depositado en nosotros su confianza». REDONDO, Nicolás, “¿Por qué ahora no?”, *Unión*, nº 44 (0) (1983), pp. 1, 3 y 4.

³⁰⁷ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la CEC al I Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 13 y 14 de enero de 1984, sig. 002606-002, pp. 1, 2, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 32, 33 y 34, respectivamente.

lectura del acta la reunión del Comité Confederal apenas aportaría mayor información relevante, a lo que se sumaría también la nula trascendencia informativa de la citada reunión.

A cargo de la elaboración del *acta* estaría Javier Vicen y de la recogida de palabras, Francisco Valenzuela, en otro ejemplo a sumar más de falta de transparencia informativa. Y, justamente, sobre la falta de transparencia de la CEC con respecto al CC se verterían las principales críticas. Por ejemplo, se denunciaría como no se informaría “por escrito” sobre la expulsión de la Unión de Álava –al respecto Saracíbar afirmaría para justificar el asunto como “no hay que llevarse a engaños y que la expulsión de los compañeros está motivada fundamentalmente por el hecho de representar una tendencia organizada dentro de la UGT”– o de la significativa ausencia de un informe de gestión de la Secretaria de Política Sindical, a sumarse a otras tantas críticas tras tantos meses desde el último Comité Confederal ordinario celebrado en abril de 1983. Y como sucedería en otras tantas ocasiones, y pese a que existían los motivos de quejas y reclamaciones, el *Informe de Gestión* sería aprobado con una 1 abstención, ningún voto en contra, de 97 miembros asistentes.

Solventando el “trámite” se pasaría a debatir y acordar la posición a adoptar frente a la negociación colectiva. Calificada la posición de CCOO como de “inaceptable”, se defendería como para UGT “cree que el 8% como tope superior de la banda es irrenunciable, así como una correcta cláusula de revisión que fuera similar a la del año pasado”. Para aclarar todavía más que posición se adoptaría Corcuera indicaría como “no se quiere que el punto medio sea del 6,5%, que es impensable que CCOO lo suscriba y que la eficacia es muy difícil que sea general”.

No convencería Corcuera a los asistentes con tales explicaciones y datos. En la larga como monótona crónica de *Unión* se hablaría de cómo tal debate “suscitó apasionados debates y profundas intervenciones”. Un estado colectivo que, por cierto, nuevamente el acta no permite interpretar tal fielmente³⁰⁸. La realidad era la que era, e inclusive Redondo afirmaría como “si no se llega a un acuerdo, a pesar de ser grave, no va a suponer en ningún caso nada que pueda hundir a la Organización la firma de dicho acuerdo”, tratando de quitar *hierro* al asunto. Pero tampoco Redondo tampoco convencería. No pocos *compañeros* –entre otros Justo Fernández, Matilde Fernández, Antonio Puerta³⁰⁹...– pedirían que en ningún caso se aceptara una banda salarial establecida en el 5,5% así como que omitiera la política salarial de los empleados públicos mandatada por los PGE de 1984. Llegado a ese punto, Corcuera inclusive dudaría en alcanzar en aquella ocasión un posible acuerdo, aunque dejaba dicho que no se descartaba en un extremo negociar “entre un 5,5 y un 8%”. Ni así se alcanzaría un acuerdo entre los miembros asistentes.

Para desatascar tan complicado aprieto se optaría por redactar una *resolución* que dejaría, en gran, medida maniata a la Ejecutiva de cara al trance final negociador. Los términos de la *resolución* venían a expresar lo siguiente: descrita la difícil situación, y de cara a “realizar un último esfuerzo de concretar un acuerdo salarial”, se optaba por mantener la “banda salarial [del] 6-8%”, con cláusula de revisión salarial “similar a la que ha existido para 1984”. Con llamamiento incluido a las “otras partes de la negociación (CCOO y CEOE) para que flexibilicen su posición”, se decía como la “UGT se encuentra prácticamente en los límites de su capacidad para admitir un acuerdo”. Avisando como en caso de que no hubiera acuerdo, “[l]a UGT reivindicará en los convenios para 1984, lo acordado en su último Comité Confederal, un crecimiento salarial del 8% y una cláusula de revisión que garantice la no pérdida del poder adquisitivo. Dándose un margen de 0,5 puntos en la parte inferior de la banda para que la CEC pueda negociar”. Una resolución que no iba a concitar la unanimidad y que

³⁰⁸ “Primer Comité Confederal Ordinario”, *Unión*, nº 46, (1984), p. 6.

³⁰⁹ Véase, al respecto, la entrevista que concedería a *El Socialista* en el último tramo de la negociación del AI’84, en donde aseguraría como no toleraría que los trabajadores siguieran «perdiendo poder adquisitivo». Entrevista, “Antonio Puerta”, *El Socialista*, nº 30, (1984), pp. 30-31.

recibiría seis abstenciones³¹⁰. Así pues, la UGT salía aparentemente reforzada pero con unos estrechos márgenes negociadores, que pronto serían superados por la actitud de la CEC de UGT en los siguientes días.

De vuelta, ahora, a la negociación, ciertamente el ambiente no era propicio para las tesis sindicales –ni socialistas ni comunistas–. Así en estos días de intervalo entre lo que sería la *ruptura formal* a la *ruptura oficial* de la negociación del AI'84, el mismo Miguel Boyer aportaba su *granito de arena* en un escenario cada vez tensionado. El mismo sábado 14 de enero daba a conocer las nuevas previsiones “oficiales” del IPC para 1983. En menos de tres meses estas habían variado radicalmente, en otro ejemplo de la *exactitud* de las previsiones gubernamentales. Resultaba que del 8% de IPC previsto se había pasado a cifras cercanas del 12,3%-12,4%. Cuatro puntos de diferencia que cambiaban todo el escenario negociador. Un incremento de las previsiones que, de nuevo, tenía un “solo” culpable a ojos de los técnicos socialistas: el crecimiento salarial. Lo que, en todo caso, no era óbice –por más que la más estricta lógica no volviera a sufrir por ello y la situación se tornará kafkiana por instantes– para desde instancias oficiosas no se dejara de hablar de los riesgos reales de un incremento del “poder adquisitivo” para la marcha de la economía. Y con todo, desde el propio Ministerio no se dejaba de apostar en que finalmente UGT y CEOE lograrían pactar una banda salarial del 6,75%, siempre y cuando no hubiera “interferencias del Gobierno”. Lo único cierto es que si por algo se caracterizaría el *equipo de Boyer* durante 1983 y también durante 1984, sería, justamente, por su falta de entusiasmo por lograr un acuerdo social.

Con una intensidad casi dramática combinada con momentos de verdadera desesperación, la UGT trataría de resucitar el siempre deseado y buscado AI'84, cuando nadie apostaba ya por un posible acuerdo. Una insistencia, mezcla de tenacidad a la par que de ingenuidad política, que iba a conllevar adversos resultados en breve, a la par que tan inútil perseverancia terminaría dañando la imagen pública de la propia central socialista, pues tan sólo ella parecía dispuesta a darlo todo por un pacto que los demás agentes habían dado por liquidado desde hacía días³¹¹.

A falta de buena voluntad política entre las partes, reuniones no faltarían. Otro clásico del “modelo español de concertación social”. Así también el 14 de enero –un día que hemos tenido la oportunidad sería bastante movido en cuanto a reuniones de todo tipo y orden, incluida una reunión del Comité Federal del PSOE³¹²– CEOE y UGT se reunían en un último esfuerzo por acercar posiciones, una vez que excluida CCOO –por la vía, nuevamente, de los hechos consumados– de quien nadie quería saber nada hubiera o no hubiera plataformas reivindicativas firmadas de por medio.

Malos augurios pesaban sobre la reunión: “Las dos organizaciones coincidían ayer al afirmar que el pacto era prácticamente imposible”, se advertía el mismo día de la reunión³¹³. Y

³¹⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Organización, “Acta del Comité Confederal Ordinario de la UGT celebrado el 13 de enero de 1984”, sig. 002606-002.

³¹¹ Una tesis también defendida, por entre otros, OLIET PALÁ, Alberto, *La política de concertación...*, op.cit.; y, KÖHLER, Holm-Detlev, *El movimiento sindical...*, op.cit..

³¹² *El Socialista* recogería completa la intervención inaugural de González del día 14 para quien, además de los problemas reales y palpables por los que atravesaba la nación, otro de los grandes asuntos era que la sociedad –sin mayores especificaciones clasistas– no había asumido, según su opinión, la profundidad de la crisis económica. Todo ello en un ejemplo de la cada vez más *elitista* visión del Secretario General del PSOE al respecto de la realidad social: «Es el gran desafío: el de la crisis económica. Y tengo una grave preocupación: no hemos ganado la batalla psicológica ante los españoles de convencerles de la gravedad de la crisis económica y de la posibilidad de superarla. No se cree hasta el fondo la delicadeza de la situación». “España vista por Felipe González. Ante el Comité Federal del PSOE”, *El Socialista*, nº 345, (1984), p. 13.

³¹³ Noticia, Rodolfo Serrano, “CEOE y Unión General de Trabajadores se reúnen hoy para intentar desbloquear las negociaciones sobre el acuerdo salarial”, *El País*, 14 de enero de 1984. Mientras tanto, las

así sería. El encuentro terminaba sin grandes avances por enésima vez. Sin avances pero con una CEOE reforzaba, que ya sin disimulos había planteado con más fuerza su *nueva* reivindicación: modificar el contenido de la “clausula de revisión”. No sólo se abría con tal iniciativa una nueva *brecha* en el discurso sindical, sino es que la patronal no perdía la oportunidad de seguir marcando la agenda política negociadora³¹⁴. Mientras que se presentaba dicha propuesta como posible vía de entendimiento, la propia CEOE también daba a conocer que entendía por modificación de la política financiera como su segundo requisito para pactar el AI’84: “De acuerdo con estas informaciones, se trataría de que el Gobierno financiera con mayores aportaciones al crédito privado la diferencia de costes salariales entre su oferta y la banda salarial de la UGT”. La *brutal ofensiva* de la CEOE quedaba despejada. Nada tenía que perder una vez conocida las previsiones y propuestas gubernamentales, que hacían de la pérdida del poder adquisitivo uno de los ejes centrales de su política económica³¹⁵. A partir de ahí, todo lo que se consiguieran sumaba enteros para sus posiciones de forma unilateral.

Se agotaba el tiempo de la negociación autoimpuesto por los propios agentes sociales. En concreto, el martes 17 de enero aparecía marcado en *rojo*. La más que previsible representación de la ruptura oficial de la negociación se transformaría en un drama de cada vez mayores tintes trágicos en las siguientes 48 horas. Quizás, por la falta de experiencia en dar un paso que no había sido muy habitual hasta las fechas, y que podía conducir a que, por primera vez, desde la aprobación de la CE no hubiera un acuerdo salarial de referencia anual. Un *drama* en donde el papel protagonista lo encabezaría UGT, quien no sólo trataría de retrasar lo inevitable mediante todos los procedimientos imaginables y no imaginables, sino que un tiempo record sería capaz de rebajar de forma muy considerable sus propuestas. El pragmatismo ugetista volvía a evidenciarse en todo su ser, aunque el precio a pagar pudiera llegar a resultar del todo elevado, más tras su último Comité Confederal.

Todo comenzaría el 16 de enero. Un lunes cargado de reuniones informales y de llamadas entre la UGT y la CEOE, y algún que otro café entre los principales responsables de la negociación de la central socialista y de CCOO –José Luis Corcuera y José María Zufiaur con Julián Ariza y Agustín Moreno, respectivamente– adquiriendo así una céntrica cafetería madrileña la condición de espacio público del “modelo español de concertación social”. Ninguno de los implicados se movió de sus posiciones aquel día³¹⁶. Desde Comisiones Obreras lo tenían suficientemente claro: “Cada vez que se negocian los convenios se está haciendo un reparto de la renta nacional y, bien, se ve a quién beneficia el marco propuesto”, declaraba Marcelino Camacho en la ciudad de León al día siguiente. Concluyendo: “Hacemos [...] lo que tiene que hacer un sindicato cuando se encuentra con una política como la que sigue Boyer y la rama blanda del Gobierno”³¹⁷. Una política que en aquellos mismos días llevaría a las propias

críticas de CCOO a una negociación exclusivamente salarial no faltarían. Véase, “CCOO mantiene su petición del 10% de aumento salarial para 1984”, *El País*, 15 de enero de 1984.

³¹⁴ La idea de esta revisión sería resumida por el cronista de *El País*, según la propia versión oficial de UGT, de la siguiente manera: «La propuesta por la CEOE requiere para ser efectiva que la inflación a fin de año supere el 9,5, con lo que si las previsiones del Gobierno se cumplen, la cláusula no podría aplicarse. Y en ese caso, toda la desviación que se produjera y que no superara el 9% sería pérdida para los trabajadores». Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT mantuvo nuevos contactos con patronal y CCOO para conseguir el acuerdo salarial”, *El País*, 17 de enero de 1984.

³¹⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE no firmará la revisión salarial para 1984 si el Gobierno no cambia su política financiera”, *El País*, 16 de enero de 1984.

³¹⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT mantuvo nuevos contactos con patronal y CCOO para conseguir el acuerdo salarial”, *El País*, 17 de enero de 1984.

³¹⁷ Noticia, Gonzalo Rodríguez, “Duras críticas de Camacho a la política económica del Gobierno”, *El País*, 17 de enero de 1984.

Comisiones Obreras a firmar los primeros convenios del año en diversos sectores como en el de Químicas con subidas en torno al 10% de media³¹⁸.

“CEOE tuvo ayer preparado un comunicado en el que daba por concluidas definitivamente las negociaciones del acuerdo salarial para 1984”. Así abría *El País* su crónica laboral del miércoles 18 de enero. “El acuerdo salarial para 1984 estuvo ayer al borde la ruptura definitiva”, remataba la noticia. Y como sucediera durante la reforma del mercado de trabajo, aunque en esta ocasión sin la presencia del Gobierno, volvían las reuniones secretas –de “carácter restringido” en aquella ocasión se denominarían–. El drama negociador ganaría aún más intensidad en las siguientes horas.

Por imbricados caminos se trataría en un enésimo intento de resucitar la virtualmente fallecida negociación colectiva. Todo ello “tras una febril actividad telefónica entre la CEOE y UGT”. “El pesimismo era más esperanzador” declararían uno de los negociadores en un todo un alarde metafórico de negación de la propia realidad. Pero más allá de toda esta representación, de toda esta teatralización, lo que quedaría por delante implicaría redoblar la enfermiza lógica seguida hasta ese momento.

Mandata por su Comité Confederal, la Ejecutiva de UGT, el martes 17 presentaría una “nueva oferta más ajustada” que, en la práctica, reducía su banda salarial al 5,5% y retocaba su propuesta de clausula de revisión salarial, “si la inflación supera el 6,2%, en lugar del 5,9% de su propuesta inicial”. En realidad, la UGT con tal oferta había llegado a su límite como se había advertido. Ni así la CEOE se mostraba satisfecha en una negociación de la que de entrada había visto asumida la mayoría de sus propuestas, y eso que la posibilidad de dar un duro golpe a la UGT se antojaba tan cercano como problemático, ya que tampoco le interesaba un debilitamiento brutal de la central socialista. No obstante, con una voracidad insaciable realizaría su última propuesta: “se planteó la posibilidad de aceptar la propuesta de UGT [...] si Miguel Boyer [...] afirmaba públicamente que la oferta de la central socialista encajaba en las previsiones económicas del Gobierno”³¹⁹. Desde las páginas de *El Socialista* no se dudaría en tildar tal *operación* como un intento de la CEOE de “modificar e incidir en la política económica del Gobierno”³²⁰.

Al día siguiente –18 de enero– la prensa por tercera vez daba por “rotas y acabas” las negociaciones, al menos, por parte de la CEOE. ¿Sería esta vez así? Complicada respuesta, si nos atenemos a la reacción de la central socialista. Tras ceder UGT en todos y cada uno de los requerimientos, incluido la espinosa cuestión de la clausula de revisión salarial, desde el sindicato se “confiaba [...] en que, finalmente, se llegará a un entendimiento entre las partes”. Incluso en aquella ocasión, el Gobierno una vez vistas, en gran medida, aceptada sus propuestas enviaría mensajes a la CEOE para firmar el acuerdo en un todo un ejercicio de cinismo político, si repasamos su actitud al respecto. De hecho, aun dadas por rotas se seguiría afirmando desde la prensa: “fuentes de absoluta solvencia aseguraban ayer que, a lo largo del día de hoy, volverán a celebrarse reuniones secretas entre las partes con el fin de encontrar una salida a la situación”.

Una perseverancia de la UGT en pos de un acuerdo digna de admirar. Con todo a los dirigentes de la central socialista, se les escapaba la razón o razones de las repetidas negativas de la patronal en llegar a un acuerdo³²¹. “Realmente no hay razones para la ruptura con nuestras

³¹⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT mantuvo nuevos contactos con patronal y CCOO para conseguir el acuerdo salarial”, *El País*, 17 de enero de 1984.

³¹⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE decidió ayer retrasar unas horas el anuncio del fracaso del acuerdo salarial”, *El País*, 18 de enero de 1984.

³²⁰ PADILLA, Sol, “La CEOE quiere implicar al Gobierno”, *El Socialista*, nº 345, (1984), p. 32.

³²¹ Una de las razones claves de las reticencias para CEOE era la ausencia de CCOO, lo que limitaba la eficacia de cualquier acuerdo salarial.

propuestas”, declararía José María Zufiaur³²². Indicando además algo que, en términos sindicales, cuanto menos era realmente llamativo: “porque el coste que acarreará [no firmar] [será una] conflictividad mayor”.

La verdad es que frente a la angustia y el dramatismo con que vivió la UGT la negociación del AI’84, lo que sucedió al día siguiente —el jueves 19 de enero— de clausurarse la ronda de reuniones fue una vuelta a la vida habitual del marco de relaciones laborales. Tal vez sorprendería a la opinión pública bien informada la actitud estético-política gubernamental, al trasladar a los medios de que la “ruptura de las negociaciones no preocupa al equipo económico”³²³. No faltarían tampoco las declaraciones contradictorias en los días previos y posteriores a la citada fecha por parte del mismo Miguel Boyer y su *entorno natural*, afirmando que no renunciaban a conseguir un acuerdo salarial³²⁴. Pero la realidad era otra: la falta de acuerdo salarial, en realidad, constituía un pequeño triunfo por parte de la posición hegemónica dentro del Consejo de Ministros. Ahora bien, *estéticamente* —insistimos en este matiz— aquellas declaraciones quedaban poco lustrosas en un momento en el sindicato hermano había dado una enorme batalla con todos sus medios a su alcance, rebajándose hasta límites realmente bochornosos en términos sindicales y políticos. Asimismo en todo aquel *ir y venir* de declaraciones se podía entresacar otra lectura a modo también de conclusión de este tiempo: la ahora batalla ganada por el equipo dirigido por Boyer tras la *derrota parcial* que había supuesto la negociación y cesión de la reforma del mercado de trabajo en sus radicales contornos originales.

Pese a que el propio Redondo llamaría a no dramatizar en caso no alcanzar un nuevo acuerdo, el nerviosismo era más que patente. De ahí, en adelante, no faltarían los ejemplos de la firme determinación de la *fe ugetista*, intentado retomar cualquier tipo o marco de negociación de referencia, aunque ya entonces con otros objetivos todavía menos confesables como examinaremos en las siguientes páginas. Eso sí, el choque con la realidad sería en extremo duro, e incluso se hablaría de cómo las negociaciones habían dejado un “poso de amargura”, y para salir del trance se *tiraría* de la vieja tonadilla: “Contigo porque me matas, sin ti porque me muero”. Tocaba, dirigir el *no acuerdo* y sus ramificaciones, a la par que defender como UGT había actuado responsablemente y que estaba exenta de posibles responsables por el *non nato* AI’84³²⁵.

Sin acuerdo salarial, lo que tocaba era negociar convenio por convenio, sector por sector, y por tanto prepararse dar una larga batalla, en donde el riesgo de un incremento de la conflictividad no era descartable. Un contexto, en cualquier caso, nunca deseado por la central de UGT. ¿Estaba preparada la UGT? ¿Cómo afrontaría dicha negociación después de tantas cesiones? De entrada, volvería a *radicalizar* su discurso de forma inmediata y cuestionando el mismo día de romperse las negociaciones las previsiones gubernamentales, que ni veinticuatro horas se daban por válidas. Todo ello sucedería en una dura rueda de prensa en donde se lanzaría múltiples acusaciones de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con afirmaciones del siguiente tenor: “[P]odemos creer en la credibilidad de cualquier miembro del

³²² «Ninguna organización sindical podría firmar las propuestas de la CEOE», declararía Marcelino Camacho en aquellas fechas. Noticia, Rodolfo Serrano, “En 1984 no habrá acuerdo salarial, al darse por «rotas y acabadas» las conversaciones entre patronal y UGT”, *El País*, 19 de enero de 1984.

³²³ Noticia, Rodolfo Serrano, “El equipo económico del Gobierno prefiere que no haya pacto si con él se supera el 6,5% de incremento medio salarial”, *El País*, 20 de enero de 1984.

³²⁴ Declararía Miguel Boyer el viernes 17 de enero cuando se daba por hecho la *ruptura* las negociaciones para un AI’84, «hay esperanzas de que se pueda alcanzar todavía un acuerdo de negociación salarial». Afirmaciones en la clausura de las reuniones de la muy liberal APD, en donde también recordaría: «No va a haber variación en los objetivos monetarios y financieros en ningún caso». Noticia, “Bayer espera que todavía se pueda alcanzar un marco de acuerdo”, *ABC*, 18 de febrero de 1984.

³²⁵ “Ni contigo, ni sin ti...”, *Unión*, nº 46, (1984), pp. 3-4.

Gobierno hasta cierto punto, pero no creemos en su infalibilidad. Las previsiones que se hacen están bien sobre el papel, pero la política económica hay que aplicarla sobre las personas”³²⁶.

El mismo 20 de enero, la Ejecutiva de UGT asumía ya plenamente lo realidad: “la imposibilidad de alcanzar un Acuerdo Marco para el año 84”. No le faltaban razones para sentirse *abandonada* a su suerte por la patronal, a quien acusaba directamente de la “ruptura” de las negociaciones. De la reunión de la CEC se saldría con la determinación de hacer público y notorio a la ciudadanía los responsables de tan tamaño desastre³²⁷. Superado este nuevo *shock*, en la siguiente como rápida reunión –el martes 24– y más sosegadamente se llevaría a cabo un análisis con mayor profundidad. Y ahí aparecía destacada como principal culpable a las Comisiones Obreras por su “postura irracional”. De nuevo, se hace necesario reflexionar sobre el *recurso culpatorio* contra CCOO por todos los *fracasos* cosechados por UGT. Todo ello a través de una singular especie de obsesión dentro del imaginario colectivo del socialismo español, que había convertido a las Comisiones Obreras en el chivo expiatorio perfecto, a partir de la clásica retórica anticomunistas tanto de UGT como del PSOE³²⁸. Por lo demás, en el caso, de la CEOE se sería más comedido, *acusándola* simplemente de no haber variado “sus posiciones de principio”. En todo caso, se trata de un *singular* examen teórico-práctico de un *sindicato de clase* así autodefinido.

Con todavía mayor determinación, se procedería a tensar y adaptar a la organización a las difíciles circunstancias futuras. Pues aunque UGT era un sindicato *responsable*, también era un sindicato *negociador* en las más adversas circunstancias. Presto realizaría varias convocatorias internas –la principal el día 25 con los responsables de las Federaciones y Uniones– de cara defender su plataforma reivindicativa convenio por convenio, sector por sector. No obstante, y aquí se da un punto relevante sobre el que merece la pena reflexionar: la *fe ugetista* volvería a reaparecer en la reunión de la CEC al mostrarse en extremo preocupada por los altos niveles de conflictividad –tildados, simplemente, como “deterioro social”– y acordarse “realizar gestiones con el Presidente del Gobierno, con el fin de intentar reconducir la situación generada”. El optimismo, sin duda, era una señal de identidad de la cúpula dirigente ugetista. Y ello que el Ejecutivo había vuelto a *ningunear* al sindicato socialista al haber procedido a sus espaldas a realizar la reconversión en Aceriales según los planes iniciales de Solchaga, y obviando, por tanto, los acuerdos de de diciembre de 1984: “Este hecho se considera de extrema gravedad, tanto por lo que representa dicho sector, como lo que supone de antecedente a seguir para el resto de los sectores a reconvertir: naval, siderurgia, textil, etc.”. Y, con las mismas, se anunciaban “drásticas” reacciones y movilizaciones, por más que unos minutos antes no se hubiera descartado volver a reconducir –vía presidencial– la situación de la negociación colectiva. Las contradicciones internas se incrementaban por instantes dentro la Ejecutiva socialista³²⁹.

Ahora bien, a nivel mediático y por tanto político, ¿quién o quiénes eran los culpables de no que hubiera AI’84? Comenzaba, de nuevo, el cruce intenso de acusaciones en donde no faltarían las consiguientes descalificaciones en un cada vez más agresivo ambiente político pero también social. Para el influyente diario *El País* a la hora de jerarquizar las culpas y a los

³²⁶ Noticia, “Sindicatos y empresarios preparan sus estrategias de cara a los convenios”, *El País*, 19 de enero de 1984.

³²⁷ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 20. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 20 de enero de 1984”, sig. 002251-003.

³²⁸ Entre otras decenas de ejemplos, puede citarse el siguiente: en el primer número de *Unión* después del fin de las negociaciones del AI’84, y tras recordar las ‘cálidas’ palabras de Redondo, se publicaba en la última página un largo artículo dedicado en exclusiva a atacar a CCOO, a quien se había marginado, punteado, insultado... y que ahora aparecía como la principal responsable de la falta de acuerdo, por encima de las posiciones maximalistas de la CEOE. El *oponente* empezaba a transformarse en el *enemigo*: “Lo que vaticinábamos”, *Unión*, nº 46, (1984), p. 24.

³²⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 21. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 24 de enero de 1984”, sig. 002251-003.

culpables –en un ejercicio ya con solera y con enorme resonancia en los centros de poder y decisión pero, al parecer, también en determinadas cúpulas sindicales– se señalaba lo siguiente:

«Una ruptura que puede producir tantos daños y que esgrime en su favor tan escasos fundamentos parece más fruto de la irresponsabilidad social y de la defensa de intereses corporativos que de posiciones coherentes y razonables».

Tras la clásica alegoría a la *paz social* se exageraba a continuación cuando se hacía repaso del anterior lustro, cuando, según el mismo diario, “España parecía más próxima a los modelos del norte de Europa que a los esquemas de conflictividad mediterránea”. Todo ello con un importante recado para la UGT:

«Los notables progresos de implantación conseguidos, por UGT en los últimos años se debieron, en buena medida, a su capacidad para conseguir acuerdos razonables, de los que salieron beneficiados precisamente los trabajadores con escasas armas en sus manos para forzar alzas salariales en sus empresas».

En resumen, que tras todo el anterior como alocado proceso de negociaciones, “el resultado final de la presión sobre los salarios de una conflictividad generalizada es imprevisible”, terminaba señalando aquel *agudo* editorial³³⁰.

El mismo periódico que hacía menos de un año había alabado el *giro político* de la UGT en su último Congreso Confederal³³¹, así como había animado a la misma central a proseguir en esa misma dirección o incluso había cuestionado la arrogancia del propio Gobierno a la hora de negociar los acuerdos sociales y salariales; lanzaría otro duro ataque a finales de enero contra la dirección de UGT. Allí no se dudaba en acusarles de practicar una “retórica demagógica”. De esta forma, en uno de los más duros editoriales que se recuerdan contra UGT durante la primera legislatura socialista, motivado tanto por su posición con respecto a la reconversión industrial y el tratamiento de los excedentes de plantillas como en relación su “radical” cambio de posición de cara a reclamar también una subida salarial del 8% en el sector público³³²; *El País* deslizaba una grave acusación contra el sindicato socialista al que se le responsabilizaba de ir con la *estricta racionalidad económica* así como alentar una oleada huelguística de imprevisibles consecuencias:

«El marco de relaciones laborales en España es todavía lo suficientemente frágil como para no poder resistir quizás una oleada de conflictos y de huelgas que fuera desencadenada por factores ajenos a la estricta racionalidad económica».

El diario *El País*, sin ningún género de dudas el periódico más serio entonces, no escatimaba en ofrecer unas pequeñas dosis de populismo cuando a continuación afirmaba: “Quizás fuera demasiado pedir a UGT que, tras el fracaso de unas negociaciones a las que había acudido con espíritu constructivo renunciase por entero a desempeñar las funciones y las tareas que definen a una central sindical”. Y es que el editorialista de *El País* tan sólo podía explicarse desde el supuesto rencor de los ugetistas el despropósito de reclamar para los trabajadores públicos el 8%. Así pues, se “equivoca al desviar contra el Gobierno la entera carga de los reproches” concluía aquel editorial para el recuerdo³³³.

La sensación de “abandono” que denunciara el mismo Nicolás Redondo por aquellas fechas no era ningún tipo de exageración. *Abandono* y añadiríamos *soledad*, sumados a no pocos ejercicios de constricción verbal. Ni una sola buena noticia recibiría en los siguientes días. Así era habitual leer en los medios a finales de aquel aciago mes: “Medios de UGT valoran negativamente actitudes gubernamentales que han crispado el clima laboral con escasos

³³⁰ Editorial, “Un acuerdo necesario”, *El País*, 20 de enero de 1984.

³³¹ Véase lo apuntado en el apartado “10.2.1.1. El XXXIII Congreso de la UGT: el «bautismo» en la lógica de la modernización socialista (junio 1983)”.

³³² Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT defenderá en las empresas públicas subidas salariales en torno al 8%, frente al 6,5% establecido por el Gobierno”, *El País*, 26 de enero de 1984.

³³³ Editorial, “La UGT y el sector público”, *El País*, 27 de enero de 1984.

resultados prácticos y que, además, han colocado a la central socialista en posiciones incómodas”³³⁴; El “clima de enfrentamiento abierto entre sectores influyentes del partido socialista y de la UGT con los ministros Solchaga y Boyer” empezar a transformarse en una pauta normal...³³⁵; “Mis compañeros y yo [Nicolás Redondo] hemos pasado muchas horas con el presidente y con el vicepresidente, pero, en el área económica, las relaciones no es que sean más tensas, pero sí hay dificultades”³³⁶.

Una soledad que se acrecentaría todavía más ante la cada vez más distancia que les separaba de CCOO. Precisamente el sindicato comunista no sólo se encontraba en mejor posición política al haberse evitado “quemarse” durante el drama negociador del *non nato* AI’84, sino que también se hallaba mejor “armado” de cara a entablar una largas y complejas negociaciones y afrontar no pocos conflictos. Era otro tipo de sindicalismo más habituado a tales lides. Pues, en gran medida, suponía la continuidad de la política que venía practicando. De hecho, para la dirección de las Comisiones Obreras, no cabía ya “medias tintas” frente a la política de reconversión, frente a los topes salariales del 6,5% impuestos al sector público – “Estamos como en la dictadura [...] ya que entonces se fijaban los salarios por ordenanza y ahora se fijan unos mínimos para que los sindicatos no puedan negociar el techo salarial”, declararía a principios de febrero Marcelino Camacho en Barcelona³³⁷– o frente a la flexibilización del mercado de trabajo y otros tantos proyectos reformistas socialistas. De tal forma, que a mediados de febrero de 1984 no descartaba incluso la convocatoria de una huelga general contra la política económica de los socialistas a la que calificaba como más dura y más de derechas que la propia de UCD³³⁸.

De cara a tensar más el por sí *caldeado* escenario político-sindical, se añadirían las frecuentes declaraciones de Nicolás Redondo contra las Comisiones Obreras, lo que tampoco ayudaba a mejorar unas relaciones profundamente dañadas. Si en los meses anteriores desde UGT se había calificado a CCOO de ser poco menos que una organización estalinista, en los siguientes se les llegaría acusar de ser un apéndice de Herri Batasuna. Suma y sigue. Una muy grave acusación cuando tan sólo en 1983 más de treinta personas habían sido asesinadas por ETA³³⁹.

Menos mal que llegado a ese punto, desde el Partido –que no desde el Gobierno– se optó por no *echar más leña al fuego*. Especialmente cuando la conflictividad se estaba disparando, y en un singular número de *El Socialista* se volvería a rescatar en su portada una manifestación de trabajadores –un *tipo de ciudadanos* que hacía tiempo que no se veían en la primera página– para titular la misma: “Solidaridad con el paro. Ante la negociación colectiva”³⁴⁰. Allí se desbrozarían las causas que habían impedido el pacto, y de nuevo, CCOO aparecía en primera línea, tal y como había sucedido en el análisis ugetista. Y aquella una acusación con palabras *gruesas*:

³³⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT defenderá en las empresas públicas subidas salariales en torno al 8%, frente al 6,5% establecido por el Gobierno”, *El País*, 26 de enero de 1984.

³³⁵ Noticia, “El Gobierno espera una inflación superior a sus previsiones para 1984”, *El País*, 27 de enero de 1984.

³³⁶ Noticia, “Redondo acusa a CCOO de actuar de acuerdo con Herri Batasuna”, *El País*, 16 de febrero de 1983.

³³⁷ Noticia, “CCOO se radicalizará si el Gobierno acelera la reconversión industrial, según Camacho”, *El País*, 7 de febrero de 1984.

³³⁸ Noticia, Carlos Fuente, “Camacho no descarta la convocatoria de una huelga general en toda España”, *El País*, 16 de febrero de 1984.

³³⁹ Noticia, “Redondo acusa a CCOO de actuar de acuerdo con Herri Batasuna”, *El País*, 16 de febrero de 1983.

³⁴⁰ Portada, “Solidaridad con el paro. Ante la negociación colectiva”, *El Socialista*, n° 346, (1984), p. 1.

«Por esa burla de CCOO, que además, socava la capacidad de acción sindical de los trabajadores y que objetivamente favorece a quienes tienen interés en desarticularlo, hay que pedir cuentas, hay que exigir responsabilidades. Hay que denunciar las motivaciones políticas ilegítimas que llevan a CCOO a sabotear las posibilidades de concertación con reivindicaciones económicamente irrealizables, planteadas a sabiendas de lo que son».

Muy debajo aparecía la *responsabilidad* de la CEOE, a la que también se consideraba que había llevado a la mesa de negociación cuestiones políticas, a las que se las calificaba como de “ilegítimas”. Tan sólo, ahí estado ahí la UGT, “única organización que, con sentido de la realidad, se esfuerza en alcanzar acuerdos que demuestran con hechos la solidaridad efectiva”³⁴¹. Desde el *calor fraternal* de la nota de opinión, pasando por el clásico alegato a lo que se denominaría como las “movilizaciones sin causa” para referirse, entre otros conflictos, al problema del campo andaluz –en un nuevo ejemplo de un revitalizado anticomunismo socialista–³⁴² otro mensaje de apoyo a la UGT llegarían en las páginas de laboral: “Hay que seguir negociando”, se titularía la mencionada crónica. No se puede negar que el mensaje al destinatario parecía claro.

Pero sobre todo esa crónica citada, dejaba apuntado un asunto de no poca importancia: la predisposición y la decisión adoptada en el Consejo de Ministros del 18 de enero –cuando todo parecía indicar que no habría ningún tipo de acuerdo– de ceder a las pretensiones –o directamente al *chantaje*– de la CEOE en materia de gasto público. Un pequeño detalle que, en general, la prensa diaria omitiría³⁴³. Y así se podía leer:

«En este sentido, la mesa de negociación salarial se convirtió en palanca de presión contra la política financiera del Gobierno, que éste captó de inmediato y a la que dio una respuesta en el pasado Consejo de Ministros del día 18 de enero [...]. Porque, preocupado por la situación que en la mesa de la concertación se estaba produciendo, el Gobierno también trató de influir de manera indirecta para que la CEOE flexibilizara sus posturas. Aquel Consejo de Ministros del día 18 acordó una serie de medidas para tratar de reducir al máximo el gasto público, procurando que la inversión privada no se viese mermada. Las medidas apuntaban a disminuir los gastos de funcionamiento, controlar las transferencias no sociales [...], recortar el déficit público, que de un 3,9 por 100 esperado para 1986 se quiera ahora reducir aún más, limitando gastos al máximo del 3,3 por 100, y desacelerar la presión fiscal que tanto molesta a los empresarios rebajándola del 0,9 por 100, de 1984, al 0,1 por 100, en 1986».

Ni así firmo ni cedió la patronal. Con todo desde las páginas del órgano oficial de prensa del PSOE se confiaría, en adelante, en la pericia ugetista, a través de lo que se denominaba, como *una cultura sindical*, para “salvar, por la vía de la negociación, los escollos que puedan presentarse en cada una de las mesas negociadoras”. Para concluir con otro indisimulado mensaje: “Un nuevo esfuerzo de superación para la cultura sindical de este país está en juego”³⁴⁴.

Leído lo anterior, se puede interpretar mejor la exultante posición de la que disfrutaba la CEOE, quien se sentiría la gran triunfadora de cómo había transcurrido toda la negociación

³⁴¹ Editorial, “La solidaridad se demuestra con hechos”, *El Socialista*, nº 346, (1984), p. 7.

³⁴² En ese mismo *recorte*, mitad opinión mitad crónica, se acusaba a CCOO y al SOC, entre otras cuestiones, de «romper la armonía [...] impedir la modernización de ese Estado, colocando barricadas o utilizando la desobediencia civil como norma»; de «actitudes reaccionarias»; o directamente de «engañar y utilizar a los trabajadores para sus intereses propios (como en el caso de la lucha interna de Comisiones Obreras)». “Movilizaciones sin causa”, *El Socialista*, nº 346, (1984), p. 8. Una cuestión que en aquel mismo número iba a tener su prolongación con otro interesado reportaje al respecto: “Movilizaciones para ocupar fincas” (p. 24).

³⁴³ Véase, Noticia, “El Gobierno se propone reducir el gasto público más de lo previsto, para que aumenten la inversión y el empleo”, *El País*, 19 de enero de 1984.

³⁴⁴ PADILLA, Sol, “Hay que seguir negociando”, *El Socialista*, nº 346, (1984), pp. 10-13. Inclusive Manuel Chaves escribiría en la citada ocasión en aquel mismo número criticando muy duramente a la CEOE: CHAVES, Manuel, “A la CEOE le gusta el proteccionismo” (p. 13).

incluido la falta de acuerdo, que en ningún caso podía interpretarse, bajo su óptica, como un *fracaso*. Ni relativo ni absoluto para más señas. Con la maestría que le caracterizaba Carlos Ferrer Salat no tardaría ni un día en acusar a los “sindicatos de mantener una política de insolidaridad”³⁴⁵.

Sintiéndose ganadora, sin prácticamente desgaste y envalentonada ante la política de hechos consumados practicada por el Gobierno, la patronal iba a ir todavía un paso más allá en sus reivindicaciones. Por este mismo camino, sin negociación de por medio con los sindicatos, un conjunto de empresas comenzarían aplicar directamente las subidas salariales del 5,5% al 7,5%. Un método negociador ensayado con relativo éxito en el sector de la Banca durante 1983, y que según los expertos empresariales tendía una gran virtud: “El efecto psicológico que produce sobre el trabajador ver reflejado en nómina este incremento hace que la crispación disminuya”. Claro está, que a los sindicatos, quienes calificarían esta singular filosofía como una “práctica antisindical”, estos mismos argumentos no eran de su agrado³⁴⁶.

No quedo ahí la ofensiva de la patronal³⁴⁷ ni las frecuentes salidas de tono chulesco³⁴⁸. El mismo presidente de la CEOE quien, día sí y día también, no dejaba de vaticinar cataclismos económicos –vía suspensiones de pagos– no frenaría su escalada de ataques contra sindicatos y Gobierno. Hasta tal punto que desde el propio PSOE en una de las escasas intervenciones públicas en boca de Manuel Chaves –responsable de la Secretaría Federal de Política Sindical– directamente se le calificará de “político neófito reaccionario”³⁴⁹.

En este clima de enfrentamiento así como de alarmante incremento de la conflictividad laboral con el que se inauguraría el año ochenta y cuatro, tales factores llegarían, incluso, a desestabilizar la precaria situación institucional como no había repetido desde el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Especialmente teniendo en cuenta que la crisis económica –lejos de voluntaristas ejercicios de autopromoción política– no se atenuaba, ni su principal consecuencia –la destrucción de desempleo– se frenaba. Todo ello por más que no se dejara de insistir diariamente en que se había tocado fondo o que lo más crudo del ajuste se había realizado. Tampoco se visualizaban los teóricos beneficios de tantos sacrificios acometidos en nombre de la *modernización socialista*. Se está, por tanto, en uno de los momentos más delicados de la década socialista, hasta el punto de poder hablar, en términos históricos, de “crisis del sistema en su conjunto”. ¿Por qué no estalló aquella situación explosiva? ¿Cómo se recondujo?

Una de las claves explicativas, aunque en verdad no será la más importante o decisiva –todo sea dicho– sería el papel que la UGT decidiría jugar a lo largo del mes de febrero, tras las presiones recibidas en múltiples sentidos. En ese *ir y venir* entre declaraciones prontamente radicalizadas y las posteriores afirmaciones conciliatorias, ya había detectado a finales de enero que la situación comenzaba a descontrolarse, y que era necesario reconducir la situación. Una

³⁴⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “El equipo económico del Gobierno prefiere que no haya pacto si con él se supera el 6,5% de incremento medio salarial”, *El País*, 20 de enero de 1984.

³⁴⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “Algunas empresas comenzaron a aplicar subidas comprendidas entre el 5,5 y el 7,5% antes de que se firmen los convenios”, *El País*, 21 de enero de 1984.

³⁴⁷ El día 2 de febrero en un ‘acto de masas’ la Confederación Empresarial Independiente de Madrid celebrara el Primer Encuentro Empresarial que reuniría en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid a más de 2.00 empresarios de Madrid, y en donde se atacaría duramente a la política económica del Gobierno, destacando su escasa sensibilidad con el empresario. Noticia, Jesús Cacho, “Los empresarios madrileños criticaron frontalmente la política del Gobierno”, *El País*, 3 de marzo de 1983.

³⁴⁸ «Los trabajadores saben que las subidas salariales serán este año del 6,5%, aunque es legítimo que los sindicatos planteen incrementos mayores», declaraciones de Juan Jiménez Aguilar, entonces presidente de CEPYME. Noticia, Rodolfo Serrano, “Los trabajadores han asumido que el incremento salarial rondará el 6%, según Jiménez Aguilar”, *El País*, 10 de febrero de 1984.

³⁴⁹ Noticia, “El PSOE llama Ferrer Salat político reaccionario”, *El País*, 2 de febrero de 1984.

decisión que ganaría enteros en la última reunión de la Ejecutiva ugetista del propio mes de enero de 1984. Un encuentro en donde cada vez se harían más visibles aquellos *objetivos menos confesables* de los que hablará en breve, y que pasarían por dos líneas de trabajo complementarias e interconectadas: sin renunciar a sus posiciones de partida de cara a la negociación colectiva –que en la práctica no había comenzado– se mencionaba ya como habían tenido lugar una serie de “reuniones mantenidas con el Presidente del Gobierno, tendentes a reconducir la actual situación”. Encuentros, de los que hasta ahora se tenía poco o nula información. El objetivo, una vez apoyados por el propio González, pasaba por “reconducir los problemas más acuciantes como son Negociación Colectiva, Reconversión Industrial, etc., que están creando una conflictividad importante en nuestro país”. De esta forma, volvería a reaparecer la UGT como el *sujeto desmovilizador* por antonomasia. Y ello en uno de los momentos más complicados para el Ejecutivo. Dicho esto, la segunda línea de actuación emprendida desde entonces, pasaría por tratar “una aproximación con la CEOE con el fin de intentar en última instancia llegar a algún acuerdo de referencia, dentro de los límites fijados por nuestra Organización”³⁵⁰.

En realidad, a efectos prácticos nada nuevo había en dicha estrategia. Lo que no era tan nuevo o repetitivo, era una situación de enorme conflictividad y tensión social, en donde la UGT por *motu proprio* pero a su vez presionada por los grandes poderes económicos y políticos de la nación, optaría por desinflar, sector por sector, convenio por convenio, la conflictividad obrera latente, pero ante todo por dirigir no pocos de sus esfuerzos político-organizativos contra el que ahora ya se consideraría, sin matices de ningún tipo como el adversario, el oponente: las Comisiones Obreras. Por tanto, el sindicalismo responsable y negociador volvía al terreno donde mejor sabía moverme, a costa de iniciar una *guerra sindical* sin precedentes y aliarse con la patronal, como veremos en el siguiente capítulo.

Si algo había quedado claro hasta el momento era el triunfo de las posiciones más duras dentro del Gobierno, lo que había reforzado, en paralelo, a una patronal crecida a partir de diciembre de 1982. Una situación que tendría su *lado positivo*: la política económica seguida por Boyer y Solchaga, con el apoyo de González, les obligaría a quitarse las “telarañas ideológicas” anti-socialistas.

Y con todo tan sólo se estaba al inicio del conjunto de reformas previstas. Quedaban por delante duras pruebas y todavía más duras batallas inmediatas, empezando por una feroz resistencia contra la política de desindustrialización. Difícilmente se podía seguir así sin que la tensión de la situación no condujera a una situación altamente inestable. Más teniendo en cuenta que el socialismo español aspiraba a desarrollar su proyecto durante más de un cuarto de siglo, tal y como se había establecido en el importante *Documento de Estrategia* del PSOE de octubre de 1983³⁵¹. Ahora bien, pero si algo había enseñado a los políticos y técnicos socialistas la experiencia de un año escaso en el poder, era que las mayorías parlamentarias no tenían porque traducirse automáticamente en hegemonías sociales por más que a su disposición se tuvieran los mecanismos de consenso y dominación.

Así pues, se está ante un punto de inflexión que conduce tanto a Gobierno como al Partido a no pocos interrogantes. ¿Con qué criterios afrontar tan delicada situación? ¿Por qué, se volvería a apostar en breve por un nuevo proceso de concertación social tras los resultados no prometedores de noviembre del 83 y sobre todo de enero del 84? ¿Sobre qué bases? ¿Con qué objetivos? De esta forma, y a no más tardar se iniciará un lento proceso de reconsideración tanto sobre las virtudes de la concertación social, y por ende, de la *paz social*.

³⁵⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 22. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 31 de enero de 1984”, sig. 002251-003.

³⁵¹ AHFFLC, PSOE-CE, “Documento de estrategia”, Madrid, octubre de 1983, sig. AI-647-08. Véase, por lo demás, lo apuntado en el Capítulo 4, *nota* 326.

Por este camino, el socialismo español –tanto en el Gobierno como a nivel partidista– afrontaría una de sus pruebas más duras durante los seis siguientes meses. El AES sería su resultado final. Un acuerdo que más allá de lecturas, de sus costes, de sus críticas, de sus enfrentamientos, le ofrecería un aspecto clave del que hasta entonces había carecido: una cierta tranquilidad social y laboral hasta junio de 1986 para concluir la primera fase reformista de su proyecto modernizador.

11. En busca de la «paz social» en tiempos de conflicto obrero: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero /febrero-julio 1984)

«Cuando no queda nada por prometer, se intenta legitimar el paro y la precariedad como algo ‘natural’, como el coste que hay que pagar en una etapa de transición para alcanzar esa especie de cielo prometido que nuestros gobernantes llaman modernidad. Estos hombres de ‘izquierda’ se limitarán a recoger su modesta participación en los beneficios y a seguir su tarea de conducir al país por los senderos luminosos de la política, donde la palabra explotación no tiene sentido, porque, para ellos, no es sino una de esas estructuras permanentes, ‘natural’ e inevitable como la sucesión de la lluvia y la sequía».

Agustín MORENO, Secretario de Acción Sindical de la C. S. de CCOO (1977-1996)¹.

Cuando se procede a introducir el *bisturí* a trepidantes periodos históricos, y, por tanto, nos adentramos en los pequeños detalles cotidianos, terminan revelándose –de forma general– todo un conjunto de factores explicativos que tienden a agrandar o a empuqueñecer, pero en cualquier caso a modificar, nuestro peculiar ángulo de visión sobre un tiempo concreto.

En términos generales, a la hora de evaluar los principales momentos de inestabilidad política, económica y/o social de los gobiernos socialistas, se ha tendido a destacar, por ejemplo, los meses previos al referéndum de la OTAN o el contexto altamente conflictivo que rodearía a la Huelga General del 14 de diciembre de 1988, junto con otros muchos acontecimientos generalmente bien conocidos. Ahora bien, lo que acontecería durante el largo I Trimestre de 1984 ha pasado bastante desapercibido. De hecho, y como se ha insistido más de una ocasión, la “verdaderas” pruebas de *resistencia* de cara a la legitimación del proyecto de modernización socialista se producirían durante los dos primeros años de mandato, y de forma concreta en las fechas cronológicas que ocupan este capítulo.

Lo que esta investigación a nivel micro-histórico ayuda a revelar como una novedad en términos históricos –al menos, a nuestro juicio– es como entre los meses de enero/febrero a mayo/junio de 1984 se evidenció, primero, una profunda crisis política en donde el ejecutivo socialista se vería obligado a rectificar, o, al menos, aminorar la marcha de su proyecto modernizador; y, en segundo término, se asiste a lo que bien podría encuadrarse como una profunda crisis del sistema en su conjunto. Muy pronto, las consecuencias del *non nato* AI’84 se mostrarán plenamente: incremento de la conflictividad laboral muy superior a la prevista del Gobierno, hasta el punto de cuestionar la propia estabilidad sistémica. Una conflictividad, además, azotada por los primeros y violentos sucesos en relación a los pasos de la reconversión industrial, y que también viene a enlazar con los resortes de la crisis económica en términos de desempleo, de exclusión social, traducidos estos últimos en la extensión de una diaria delincuencia callejera. Un panorama para nada halagüeño que todavía se va a complicar más, en términos políticos, ante la prepotencia mostrada por el Ejecutivo ante el creciente desencanto de amplios sectores de la clase trabajadora con los socialistas y sobre todo por el empeoramiento generalizado de la crisis económica social en amplias capas populares.

Por tanto, en esta situación de pre-emergencia económica y social así como menor medida política –aunque garantizada en un último extremo la estabilidad constitucional gracias a la amplia mayoría absoluta del PSOE tanto en octubre del 82 como en mayo de 83– el primer y más urgente desafío pasaría por *desactivar* un conflicto social-obrero en auge desde principios del año ochenta y cuatro. Un conflicto, que si bien hunde sus raíces en años anteriores, a la llegada de los socialistas se va a ver incrementado de forma general y natural ante sus decisiones “liberales” en materia económica y social, lo que terminaría, a su vez, por contribuir a su consolidación y extensión. Un *incendio social* que para su apagado no se

¹ MORENO, Agustín, “Prólogo” en COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos...*, op.cit., p. 28.

escatimarán en medios: bien mediante las promesas de un nuevo *pacto social*, bien mediante la represión pura y dura contra el movimiento obrero, bien mediante promesas de devolución del patrimonio sindical y otras contraprestaciones económicas a los sindicatos de clase y no todos en este caso. Un escenario crítico en donde tanto el Partido como desde el Gobierno, junto con la intensa colaboración de UGT, más allá de aislar y deslegitimar a las Comisiones Obreras – principal sujeto político movilizador– empezarán a mostrarse más flexibles en relación a determinadas cuestiones de índole económico, que no mucho antes se consideraban intocables. Una novedad que no puede desdeñarse, pero que más que reflejar una real voluntad negociadora se transformaría en un signo de pragmatismo por parte de un Gobierno acuciado en la calle antes que la sede parlamentaria, y que nunca pensó si siquiera modificar la *dirección* y *metas* de su política económica.

Pero además, en estos meses se concatenan una suma de debilidades por parte de los principales protagonistas de la vida política, económica y social del país. Bien a través de procesos congresuales –en el caso de CCOO, de la propia CEOE o más adelante del propio PSOE– bien mediante problemas y divisiones internas cada vez más patentes –caso de la propia UGT y del propio Gobierno de la nación–. Todo ello en una coyuntura que constituye la antepuerta de un renacido interés por un nuevo pacto social que garantice, por consiguiente, la *paz social* al Gobierno en lo que quedaba de legislatura. Aquí también se observarán interesantes movimientos en múltiples direcciones a la hora de poner en marcha un proceso negociador, que tardará en abrirse de forma oficiosa, prácticamente, todo el tiempo objeto de este epígrafe.

Así pues, durante los primeros meses del año ochenta y cuatro a lo que se asiste es a una interminable búsqueda de posibles salidas para una crisis económica, que va a evidenciar sus efectos más perversos y desestabilizadores. Que no estallará en su momento una crisis social generalizada que hubiera en su caso podido *tumbar* al Ejecutivo, no le resta un ápice de intensidad ni de dramatismo a dichos meses históricos. En torno a las causas de esta situación, las soluciones pergeñadas y finalmente los factores que desactivaron el conflicto, se hablará largo y tendido en las siguientes páginas.

Nos movemos, por tanto, entre los meses de enero/febrero a junio/julio de 1984. Cerca de medio año en el que se entrecruzan, por lo demás, dos procesos estrechamente interrelacionados. Por un lado, la larga tramitación parlamentaria de la RET'84, tras su *proceso de hibernación*, caracterizada por fuertes enfrentamientos parlamentarios, pero que, en términos prácticos, no tendrán ningún tipo de repercusión mediática ni mucho menos social. Y, por otro lado, se introducirá, desde entonces, otra importante variable: a pesar de la tramitación de la futura Ley 32/1984, tanto desde el Gobierno como del Ministerio de Trabajo como por descontando desde la CEOE, no se dejará de repetir, insistentemente, en la necesidad de avanzar en la flexibilización del mercado de trabajo en una visión cada vez más “radical”. Lo que, por sí mismo, mostraría como el acuerdo de noviembre de 1983 había frustrado no pocas “perspectivas liberales”. Unas propuestas flexibilizadoras que inmediatamente finalizado el susodicho trámite –un 26 de julio de 1984– se introducirán en la agenda del futuro AES. Prácticamente sin solución de continuidad, la ofensiva flexibilizadora reaparecería en el escenario político.

De esta forma, nos situamos en unos meses transcendentales no sólo para explicar el posterior tranquilo final de la II Legislatura, sino sobre todo para examinar e interpretar las causas profundas de otro de los grandes éxitos de los gobiernos socialistas: la desactivación de una situación si no pre-revolucionaria si desestabilizadora del sistema en su conjunto. Aquí el papel de Felipe González, como líder de la nación, del Partido, del Gobierno, y como referente ético-moral de una gran parte de la sociedad y del electorado devendrá central de cara a garantizar, a su manera, el control de la situación social.

11.1. La narrativa socialista frente a la realidad socioeconómica: el particular como singular *realismo mágico* del socialismo español²

“INEM: 351.700 desempleados más entre octubre de 1982 y 1983”³; “El paro registrado aumentó un 9 por 100 en España el año pasado”⁴; “La mitad de los parados sin cobertura viven de la economía sumergida”⁵; “La destrucción de empleo asalariado en 1983, seis veces superior al de 1982”⁶; “Aumentan las personas que buscan empleo y las ofertas de trabajo permanecen estancadas”⁷; “Uno de cada cinco españoles en edad laboral está en paro”⁸; “El miedo al paro hace disminuir el número de trabajadores que solicitan baja médica”⁹; “Más de la mitad de los parados tiene menos de 25 años, según el ministro de Trabajo”¹⁰; “Un tercio de los parados permanece en situación de desempleo durante más de dos años”¹¹; “En el sector privado se han destruido durante los tres primeros meses del año 110.230 empleos asalariados”¹²; o, “El paro alcanzó al 20,1% de la población activa española en el primer

² Véase lo apuntado en su momento en el apartado “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

³ Noticia, José María López Zumel “INEM: 351.700 desempleados más entre octubre de 1982 y 1983”, *ABC*, 9 de enero de 1984. El mismo periodista titulaba aquella nota informativa de la siguiente forma: “Alegrías injustificadas en muchos políticos”, para desacreditar a continuación cualquier tipo de optimismo con respecto a unos siempre malos resultados en términos de paro. De hecho, aquella delicada situación por la que atravesaba la economía española sería resaltada por el prestigioso periódico *The Economist* en el mes de enero de aquel mismo año. Así lo recogía también una noticia breve del *ABC*: Noticia, “Más paro, según «The Economist»”, *ABC*, 7 de enero de 1984. Texto en donde se apoyaba firmemente la política seguida durante el primer año de mandato de Felipe González.

⁴ Noticia, Vicente Clavero, “El paro registrado aumentó un 9 por 100 en España el año pasado”, *ABC*, 15 de enero de 1984.

⁵ Noticia, “La mitad de los parados sin cobertura viven de la economía sumergida”, *El País*, 22 de enero de 1984.

⁶ Noticia, Gustavo Matías, “La destrucción de empleo asalariado en 1983, seis veces superior a la de 1982”, *El País*, 23 de febrero de 1984. Se indicaba en aquella misma información lo siguiente: «Durante 1983 han sido destruidos 125.200 empleos asalariados, seis veces más que el año anterior (20.100), según datos oficiales. Mientras el sector privado perdió 256.000 puestos (hasta quedar en 5.730.700), el público gana 131.300 (hasta 1.782.500). El balance ha sido algo atenuado, por el fuerte aumento de los trabajadores autónomos».

⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “Aumentan las personas que buscan empleo y las ofertas de trabajo permanecen estancadas”, *El País*, 15 de marzo de 1984.

⁸ Noticia, “Uno de cada cinco españoles en edad laboral está en paro”, *El País*, 23 de marzo de 1984.

⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El miedo al paro hace disminuir el número de trabajadores que solicitan baja médica”, *El País*, 26 de marzo de 1984. Se está aquí ante una de los efectos perversos silenciosos más comunes de la crisis económica por la que atravesada la nación. Así se podía leer en aquella misma información: «Desde 1979 se ha venido reduciendo el índice de incidencia –índice que se produce al relacionar el número de trabajadores empleados con el de siniestros– de los accidentes o enfermedades que han causado baja. En los últimos cinco años, la secuencia ha resultado negativa, produciéndose un decremento del 4,9% en 1979, del 8,6% en 1980, del 5,7% en 1981, del 4% en 1982 y del 4,2% en 1983».

¹⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “Más de la mitad de los parados tiene menos de 25 años, según el Ministro de Trabajo”, *El País*, 13 de abril de 1984.

¹¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Un tercio de los parados permanece en situación de desempleo durante más de dos años”, *El País*, 14 de abril de 1984.

¹² Noticia, Gustavo Matías, “En el sector privado se han destruido durante los tres primeros meses del año 110.23.000 empleos asalariados”, *El País*, 4 de junio de 1984.

semestre”¹³. Los anteriores entrecomillados tan sólo constituyen una pequeña selección de algunos de los muchos titulares que encabezaron entre enero a julio de 1984, las secciones de Economía y Trabajo, cuando no las cabeceras de los principales periódicos del país.

En verdad, tampoco había que rebuscar mucho. Ahí estaba la *verdadera* realidad sociolaboral del país en la epidermis de cada titular, en la epidermis de cada declaración institucional, política o sindical. Pero también a nivel social, a nivel de barrio, a nivel de la calle en la mayoría de las barriadas obreras de las grandes urbes: desempleo masivo con una intensidad tremenda en el colectivo juvenil, economía sumergida, paro de larga duración, pero sobre todo *miedo* a perder el trabajo y, por tanto, mayor aceptación pasiva de las pobres condiciones laborales ofrecidas.

A lo que se añadía una característica muy propia de este tiempo: los records consecutivos en número de desempleados registrados cada mes, cada trimestre... lo que a su vez tenía la capacidad de desinflar, a nivel colectivo, las “esperanzas colectivas” en la superación de la crisis. De esta forma, en el primer trimestre de 1984 se alcanza los 2.723,200 desempleados, según la EPA. Una de las cifras más altas de toda la “década del cambio”. El año terminaría con el 20,1% de la población activa en paro, dividiéndose en grandes segmentos de la siguiente forma: Hombres, 18,7%; Mujeres, 23,2; y Jóvenes, 33%. Y con todo, estos datos no iban a representar, ni mucho menos, los peores registros de la época socialista.

Sin embargo, en este contexto de desempleo masivo las cifras por muy llamativas que pudieran resultar a primera vista, tan sólo reflejaban una parte de un drama humano extendido entre amplias capas de la clase obrera principalmente. Podrían darse otros tantos datos disgregados o procedentes de cálculos matemáticos complejísimos, pero poco o nada nos ayudarían a acercarnos al citado drama humano de ser parado durante la primera mitad de la década de los ochenta. Para no pocas familias la propia subsistencia –entendida esta en su plena acepción marxista– constituía una realidad cotidiana en una lucha por bordear cuando no *trampear* la exclusión social, de la que se entraba fácilmente pero de la que difícilmente se salía¹⁴. En este ambiente de bloqueo generalizado de acceso al empleo –por ejemplo, en el primer trimestre de 1984 más de un millón de nuevos parados buscaban su primer empleo– es donde la generación del *baby boom* mayoritariamente procedente de la clase asalariada y/o de la clase obrera, tendría que iniciar su trayectoria laboral. *Generación y clase*, en este caso concreto, van íntimamente ligados.

Igualmente en pocas ocasiones se ha valorado de forma suficiente ni con la perspectiva histórica adecuada, los perversos efectos que una crisis de este tamaño tiene a nivel psicológico así como a nivel ético-moral para quienes así lo viven¹⁵. Es aquí cuando la cohesión familiar característica de los países del sur mediterráneo así como los *resquicios* de las redes de solidaridad vivos en las todavía comunidades obreras¹⁶, explicarían como no pocos núcleos familiares pudieron –como señalábamos– *trampear* a la exclusión social. A saber, gracias a la cooperación y solidaridad. Estamos, a buen seguro, ante de uno de los mejores ejemplos de nuestra contemporaneidad del funcionamiento de la solidaridad entendida como un factor clave de la conciencia de clase¹⁷. En unos tiempos, en que la protección por desempleo cubría a un muy bajo sector de la población con derecho, además de ser prácticamente irrisorias las

¹³ Noticia, “El paro alcanzó el 20,1% de la población activa española en el primer semestre”, *El País*, 20 de julio de 1984.

¹⁴ A nivel bibliográfico, primero, nos remitimos a, Capítulo 2, *nota 242*; y a nivel de los datos a lo también apuntado en el Capítulo 8, *nota 37*.

¹⁵ Véase en el Capítulo 2, *nota 146*, *nota 147* y *nota 148*.

¹⁶ RODRÍGUEZ, Emmanuel, *El gobierno imposible...*, *op.cit.*.

¹⁷ Nos remitimos a lo expuesto en su momento en el apartado “3.3. Debates, lecturas, controversias en torno al *nuevo* movimiento obrero en la España de la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos”.

cantidades que se recibían, la búsqueda de un soporte material naturalmente se extendía fuera de las fronteras de un muy débil Estado del Bienestar. Por tanto, los *déficit* de la cuestión social en este tiempo histórico concreto resultan evidentes.

Ahora bien, con las mismas ha de decirse que esta misma historia, esta misma memoria social colectiva, se ha perdido mayoritariamente en el tiempo. Primero, por la sencilla evidencia, de que este tipo de capítulos no suelen figurar en los grandes relatos por razones más que obvias. De hecho, mal casa este tipo de historias con las mayoritarias interpretaciones glorificadoras de este tiempo. Y en segundo lugar, por la también sencilla razón de que la conservación de esta misma memoria social por los propios protagonistas no suele ser muy frecuente, excepto en los casos más militantes. Así pues, si bien tenemos algunos relatos procedentes de fines de los setenta, en el caso de los ochenta sigue siendo complicado encontrar estudios o biografías que nos hablen de este tipo de solidaridad de clase.

Ante esta situación, la *narrativa socialista* a la hora de destripar las estadísticas, ordenar interesadamente las causas y factores del paro/desempleo, así como justificar el momento dado, seguiría el rumbo consabido: un lenguaje político capaz de transformar desastrosos datos en perspectivas y promesas de una futura salida a la crisis, y con ella de un *mundo más feliz*¹⁸. En este crucial periodo de tiempo –entre el primer trimestre de 1983 al primer trimestre de 1984 el paro crecería en 300.000 personas, incrementándose en más de dos puntos la tasa de desempleo hasta el 19,38% en enero del ochenta y cuatro– la maestría socialista en relación al buen hacer de su prolífico lenguaje político al respecto se pondría a prueba, superando uno de los momentos más difíciles por lo que atravesaría el socialismo español en su etapa de Gobierno. Y lo haría con nota y con una considerable inteligencia política. Los mismos técnicos ministeriales así como los muy abundantes “intelectuales orgánicos socialistas”, que poco más tarde serían capaces de culpar al *pollo congelado* y al *conejo* de la elevación de la inflación –hasta llegarse a hablar en la propia prensa de la “teoría cuantitativa del precio del pollo”¹⁹– desarrollarían sus tácticas discursivas y mediáticas en este campo de entrenamiento.

“La obligación de un político [...] es decir que el año que viene va a ser mejor”, aseguraría Felipe González un 23 de diciembre de 1983. Para a continuación indicar: “Yo me resisto, a hacer un ejercicio premonitorio, pero tengo la esperanza de que vayamos mejorando”²⁰. Con la habitual dosis de *optimismo* a la par que del supuesto realismo del que siempre haría gala el Ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, un día antes, el 22 de diciembre, en la Comisión de Política Social y de Empleo del Congreso de los Diputados, brindaría a los señores diputados todo un ejemplar ejercicio de reinterpretar desastrosos datos en perspectivas casi positivas de recuperación. Una intervención motivada, no se olvide, gracias a la repetitiva Proposición no de Ley de los Grupos Parlamentarios Minoría Catalana y Popular *sobre información periódica por parte del Gobierno de la evolución periódica de los niveles de empleo y paro*, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados un 28 de junio de 1983. Proposición aprobada por una amplísima mayoría y por la que el Gobierno se comprometía a “informar con carácter trimestral al Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Política Social y de Empleo, previa comunicación por escrito, y siempre en relación a situaciones que tengan una referencia no superior a los sesenta días anteriores al informe”, en torno a las principales variaciones y disgregaciones del empleo/desempleo a través de los datos

¹⁸ Téngase presente que a la salida del XXIX Congreso del PSOE de 1981, los socialistas prometerían en su *Resolución Política*, la «felicidad para todos los hombres». Véase lo apuntado en el Capítulo 4, *nota* 324.

¹⁹ Véase aquí, SEBASTIAN, Luis de, “La teoría cuantitativa del precio del pollo”, *El País*, 1 de abril de 1986.

²⁰ Noticia, “El jefe del Gabinete ofrece esperanza para 1984”, *El País*, 24 de diciembre de 1983.

del INEM²¹. Una Proposición no de Ley acogida con notable escaso entusiasmo por el propio Ministro de Trabajo y en donde, por regla general, escasa sería la ocasión en que se entregara previamente la documentación descrita.

Pero yendo ya a los hechos, en la citada ocasión a Joaquín Almunia le tocaría explicar los datos del tercer trimestre de 1983. Allí entre otros muchas cifras se señalaban las siguientes:

«En el tercer trimestre de 1983 y según la encuesta de población activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, el número de parados era de 2.335.000, es decir, el 17,7 por ciento de la población activa. Respecto al segundo trimestre, el trimestre anterior supone un aumento de 79.000 personas en paro, un 3,5 por ciento, y respecto al tercer trimestre del año anterior supone un aumento de 201.000 personas, un 9,4 por ciento».

En aquella ocasión, afirmaría el señor Ministro, por ejemplo, que los datos de 1983 evidenciaban una “reducción en la tasa de crecimiento del paro, en el ritmo de crecimiento del paro, reducción muy importante”; un segundo argumento de peso sería el cuestionamiento de las propias estadísticas al referirse a la “falta de calidad [de las estadísticas] para conocer muchos de los aspectos de nuestro mercado de trabajo”. No terminó ahí, pues, a continuación indicaría con no poco entusiasmo: “al igual que sucede con la tasa de crecimiento del paro, que se está desacelerando considerablemente, también el descenso del nivel de empleo se ha desacelerado considerablemente”. Concluyendo que con los mismos datos se podían atestiguar unas “perspectivas relativamente optimistas”. Eso sí, según el propio Almunia señalaría, por último, que con los socialistas en el poder se había tratado “el tema del paro con mucho mayor rigor, seriedad y falta de demagogia que hacerlo con frases hechas”²².

Ha de reconocerse que en materia de comunicación social, los socialistas siempre fueron un paso por delante de sus competidores políticos. Sin nunca reconocer o hablar directamente de fracaso de la política económica socialista, los técnicos y políticos serían capaces de ofrecer todo un elaborado discurso sobre el “no” fiasco de su política de empleo durante toda su primera legislatura. Todo ello entrar en las causas reales del problema. Causas de todos conocidas –se enunciarán o no–: la destrucción neta de puestos de trabajo como consecuencia de la crisis de rentabilidad del sistema capitalista tras el *crack* de los setenta. Así siempre que hablaba de las cifras del desempleo, no dejarían de destacar que lo peor del ajuste había pasado o se estaba cerca de la salida definitiva de la crisis, a pesar que las estadísticas mostrarán, por el contrario, una *tendencia creciente del paro*²³. Una “luz al final del túnel” que nunca se llegaba a ver en todo su esplendor. Ahora bien, cuando comenzaron a llegar las primeras “señales” de recuperación, aquello se celebraría como la refutación de todos los presagios tantas veces errados, y que, por cierto, poco o nada tenían ver que con las propias realidades económicas que se habían aventurado a predecir. A lo sumo, pues, durante el primer año y medio de mandato se mencionaría la palabra “desajuste” en contadas ocasiones.

²¹ CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, *Proposición no de Ley de los Grupos Parlamentarios Minoría Catalana y Popular sobre información periódica por parte del Gobierno de la evolución periódica de los niveles de empleo y paro*, II Legislatura, nº 50, 28 de junio de 1983, pp. 2397-2401 (número 32-I, Serie D, de 11 de marzo de 1983); y en relación al propio contenido de la citada Proposición no de Ley: BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, *Proposición no de Ley relativa a solicitud de información periódica por el Gobierno por la evolución de los niveles de empleo y paro*, II Legislatura, 6 de julio de 1983, nº 32-II, Serie D, p. 84/1.

²² CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO, *Acta taquigráfica de la sesión celebrada con asistencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Almunia Amann), quien expuso la política general de su Departamento*, II Legislatura, nº 6, 1983, 10 de febrero de 1983, pp. 23, 24 y 28.

²³ En cualquier caso, los socialistas aquí contarían –como en otros tantos campos con un aliado indispensable– el diario *El País*, quien por ejemplo en un editorial de junio hablaba de cómo se estaba en el «medio camino de los sacrificios». Editorial, “El paro, la pobreza y la economía sumergida”, *El País*, 3 de junio de 1984.

Por otro lado, no se dejaría de insistir –a la hora de explicar las *malas cifras* en términos de destrucción de empleo– en aspectos psicológicos –el denominado *efecto llamada* de *El Cambio* y de la apertura de las *Oficinas del INEM*²⁴, lo que, a su vez, habría dado lugar a una especie de “turismo del parado” basado en apuntarse a las listas del desempleo– en las cuestiones demográficas –la mala hora de la llegada de la generación del *baby boom*– o incluso en supuestas conspiraciones procedentes y fomentadas desde la extrema derecha para que todo los parados se apuntarán a las listas del INEM, como en su día denunciaría el mismísimo Felipe González²⁵.

Entre reformulaciones estadísticas de la EPA –ante la sospecha nunca fundamentada de sus errores y desviaciones²⁶– y otras tantas vueltas al mismo significado y contenido del lenguaje estadístico, tanto desde el Gobierno como del Partido se las apañarían para ir justificando en cada momento las cifras mensuales o trimestrales, sin nunca reconocer su incapacidad de generar un modelo desarrollo satisfactorio para terminar o cuando aminorar la lacra del paro. Explicaciones, eso sí, todas *ex novo* por parte de los socialistas. O dicho de otro modo: en este mismo terreno la *capacidad de inventiva* sería mayúscula.

Recuérdese que tampoco faltaría en este mismo tiempo por parte de los socialistas, las numerosas como frecuentes acusaciones de fraude que supuestamente cientos o miles de trabajadores cometían al percibir las ayudas de la Seguridad Social. E inclusive las también muy frecuentes denuncias contra no pocos sectores de asalariados por trabajar en la economía sumergida²⁷. Otros tantos ejemplos se podrían citar²⁸.

²⁴ No faltan los ejemplos –véase aquí la *nota 2*–. Por lo demás, en una noticia publicada por *ABC* se aportaban los siguientes datos, a partir de los cuales los socialistas fundamentarían su *retórica* sobre el *efecto de llamada*: «Y, en segundo lugar, al hecho de que el tercer trimestre de 1982 hubo una avalancha de registros en las oficinas de empleo, que no se repitió en 1983. En octubre, noviembre, diciembre de hace dos años se inscribieron casi 300.000 personas, debido a la inminente llegada de los socialistas al Gobierno. El PSOE había prometido crear, durante su mandato, 800.000 puestos de trabajo, y miles de personas se apuntaron a las oficinas de empleo, animadas por ello». Noticia, Vicente Clavero, “El paro registrado aumentó un 9 por 100 en España el año pasado”, *ABC*, 15 de enero de 1984.

²⁵ Véase lo apuntado en el *Capítulo 2, nota 612*.

²⁶ *El País* en un conocido editorial señalaba: «No faltan analistas de que muestran cierto escepticismo respecto a la fiabilidad estadística de las cifras de paro en España». Tesis ampliamente compartida por el equipo económico del Gobierno empezando por Carlos Solchaga –véase *Capítulo 2, nota 613*– aunque nunca refutada en el terreno de la praxis, y siempre sujeta a teorías apriorísticas como las que presentaba el mismo diario de comunicación: «Dada la reducida cobertura del subsidio de desempleo, la conflictividad política y los fenómenos sociales serían forzosamente muchos mayores –según esta interpretación– si el paro alcanzase realmente a la quinta parte de la población española en edad y con deseos de trabajador. Resultaría necesario distinguir, así pues, entre el paro oficial y el paro real, discrepancia explicable, en buena medida, por la utilización que hace la economía sumergida de mano de obra clandestina». Editorial, “El paro, la pobreza y la economía sumergida”, *El País*, 3 de junio de 1984.

²⁷ En la permanente campaña contra el supuesto fraude de los trabajadores, tanto en materia de la Seguridad Social como en relación al sistema de protección por desempleo, las propuestas de salida de los socialistas concordarían en argumentos y en datos con los sectores más conservadores y reaccionarios de la derecha española, y claro está, con las posiciones de la clase empresarial. Muy interesante al respecto en estos meses de crisis sería la repercusión que tendría la publicación de un amplio reportaje por parte de *ABC* al respecto, un 21 de marzo, y en cuya portada se podía leer: «La Seguridad Laboral, enferma». Con un *bocadillo* en donde se indicaba: «Alrededor de setecientos mil pensionistas, a los que se acepto invalidez, defraudan a la Seguridad Social 200.000 millones de fraude de desempleo, según datos a los que ha tenido acceso *ABC*. La carga de la Seguridad Social [...] se hace insoportable para los Estados y ahoga a las empresas hasta paralizar una buena parte de la actividad económica [...]. Los Fondos de Pensiones podrían ser la vía para sanar una enfermedad que puede quebrar al propio Estado». Editorial, “La Reforma de la Seguridad Social”; así como el amplio, Reportaje-Informe, “Seguridad Social: carga insoportable para la economía española”, ambos en *ABC*, 21 de marzo de 1984. Una campaña a la que

Aquello, de hecho, se terminaría por constituir en una capacidad político-lingüística que recordaba al *realismo mágico* latinoamericano de los sesenta y setenta, a la hora de realizar la oportuna relectura de los datos que ofrecía el INEM o la EPA. Con una nota añadida: la evidente y constatada insensibilidad política y social ante la situación de decenas de miles de familias que –como dice el dicho popular– *no llegaban a fin de mes*.

Llamase o no manipulación de la realidad social, económica o simplemente estadística, la *narración socialista* acerca del problema del paro perseguiría tres grandes objetivos: primero, reforzar el proyecto modernizador en una sola dirección –dentro de la *lógica liberal*– en tanto la mejora del empleo sería la consecuencia final de un proceso previo condicionado, en todo momento, por asegurar la inversión y la rentabilidad empresarial; segundo, evitar cualquier tipo de traslación de la realidad estadística a la realidad social, de cara a aminorar un posible o potencial incremento del conflicto laboral; y en tercer lugar, justificar la necesidad de flexibilizar/liberalizar un mercado de trabajo siempre rígido²⁹. Un mercado laboral tan deprimido, en donde las figuras de contratación temporal apenas eran empleadas³⁰.

Fueran cuales fueran los datos, más o menos *horrorosos* durante 1983 y 1984, estas tres cuestiones siempre estaban presentes bien en boca de Felipe González³¹, de Miguel Boyer o del propio Joaquín Almunia, el más consumado especialista en este tipo de metáforas de cara a encubrir la realidad laboral. Mientras tanto, la promesa de un cercano futuro prospero –cuantificado en meses o en años, según la ocasión³²– se podría alcanzar si seguía el único

pronto se sumaría –a su medida– *El País*: Editorial, “La quiebra de la Seguridad Social”, *El País*, 27 de abril de 1984.

²⁸ De esta forma, tras darse a conocer los datos de la EPA del primer trimestre de 1984 desde el Ministerio de Trabajo, no se dudaría en afirmar: «a partir de este año, tras el cambio del sistema de empleo comunitario, a sus beneficiarios que antes eran considerados como ocupados se les considera como parados». Una explicación tan baladí como falsa con la que *echar balones a fuera*, tal y como reconocieron los expertos consultados. Noticia, “Uno de cada cinco españoles en edad laboral está en paro”, *El País*, 23 de marzo de 1984. Véase también: Noticia, Gustavo Matías, “En el sector privado se han destruido durante los tres primeros meses del año 110.23.000 empleos asalariados”, *El País*, 4 de junio de 1984.

²⁹ De este modo, lo justificaba el poderoso Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entonces Secretario de Estado de Economía y Planificación, durante una conferencia. A poco menos de dos meses para aprobarse la RET’84 defendía con todo ahínco la vía del ajuste emprendido –moderación salarial, política monetaria, reducción del déficit público– argumentando también como la única vía para crear empleo pasaba por la contratación temporal y a tiempo parcial. Noticia, “La creación de nuevos empleos se producirá a finales de año, según Fernández Ordoñez”, *El País*, 2 de abril de 1984.

³⁰ En marzo de 1984 en pleno debate parlamentario de la RET’84, se conocían los datos del cierre del año 1983. Se podía leer en una crónica laboral lo siguiente: «En 1983, 1.471.200 personas encontraron trabajo a través de las oficinas de empleo. Esta cifra supone un descenso de 135.000 con respecto al año anterior y de 437.000 si se compara con 1980 [...]. Del total de nuevos empleos registrados, 431.232 corresponden a puestos de trabajo creados al amparo de algunos de los diferentes programas de empleo. También en este capítulo se ha registrado un notable descenso [...]. La modalidad más utilizada por los empresarios ha sido la contratación temporal, aunque también se ha registrado una disminución respecto a 1983. Ese año fueron 253.183 los contratos suscritos, frente a los 220.000 firmados el año pasado». Noticia, Rodolfo Serrano, “Aumentan las personas que buscan empleo y las ofertas de trabajo permanecen estancadas”, *El País*, 15 de marzo de 1984.

³¹ En muy pocas ocasiones el presidente del Gobierno reconocería un relativo fracaso en la política económica, y por consiguiente, en la política de empleo. En una intervención en la Asociación de Periodistas de Información Laboral, *reconocería*, por vez primera, que la creación de empleo no marchaba como se esperaba. ¿Las causas? Pues la profundidad de la crisis económica –junto con la manida idea-fuerza de la *herencia recibida*– la estrategia insolidaria de los sindicatos y prácticamente la avaricia de cada uno de los empleadores del país. Noticia, Vicente Clavero, “Felipe González reconoce un retraso en la creación de empleo, respecto a lo previsto”, *ABC*, 30 de marzo de 1984.

³² En cualquier caso, siempre imperaría con Almunia una cierta prudencia a la hora de hablar y *predecir* la evolución de las grandes variables macroeconómicas que afectaban a su Departamento. Así

rumbo posible y se atajaba “el Mal” de la rigidez, como bien daban cuenta las “infalibles” previsiones del equipo económico del Gobierno. Sobre todo una vez que el lastre de la *fallida* promesa de los 800.000 puestos de trabajo se había declarado como una “especie de utopía” hacía ya tiempo.

Así pues, el “realismo mágico” de la narrativa socialista en esta materia daría sus frutos más tarde de lo previsto, pero sin que por el medio se cuestionara lo que en esencia importaba: el proyecto de modernización socialista. No era poco en un tiempo de conflictos obreros y sociales generalizados en donde la legitimidad de las urnas y la inteligencia política de los dirigentes socialistas, se convertirían en dos poderosos factores para desactivar tal ciclo conflictivo.

11.2. El último episodio de «lucha de clases» en la España contemporánea: el I Trimestre largo de 1984

«La inocultable destrucción de empleo, convertida en el fantasma tenebroso del paso, anima las protestas contra las reconversiones industriales, apareciendo un movimiento difuso una veces y otras de lucha abierta por fuera de la labor institucional de las propias organizaciones instituidas que trata de contraponerse a la ideología oficial del ‘suicidio forzado de clase’ hasta tal punto que en este proceso está jalonado de ‘puntos muertos’ donde el conflicto toma proporciones incluso violentas».

Luis Enrique ALONSO, *Conflicto laboral y cambio social*³³.

José Babiano y Leopoldo Moscoso en un texto científico con un título difícil de olvidar –“Los conflictos sociales en fase depresiva ante la adopción de políticas de ajuste: el caso español”– publicado hace ya unos años, se detenían en leer pormenorizadamente –como en otros pocos trabajos– las causas y factores de la profundidad e intensidad del ciclo conflictivo que arranca a mediados de los setenta y que se puede llevar, al menos, hasta finales de 1984. Destacaban los autores, que si por algo se distinguía aquella conflictividad era por su *carácter defensivo*, “como reacción frente a los impactos *concretos* de la crisis económica sobre las condiciones de vida y trabajo de la población”³⁴. Ahora bien, es cierto, tal y como mantuvieron ambos autores, que ¿los “trabajadores se batieron en retirada”?³⁵.

Dentro de la historia social en el caso español, el resbaladizo asunto de la conflictividad, de las huelgas obreras en la España contemporánea, hasta el momento ha

pues, optaría, generalmente, por enfriar el ambiente y las expectativas. De esta forma, anunciaría a fines del fatídico mayo del ochenta y cuatro como «los efectos de la política que el Gobierno está aplicando tardarán en conocerse. En los próximos 10 o 15 años». Noticia, “El paro seguirá muy alto durante los próximos 10 años”, *El País*, 26 de mayo de 1984.

³³ ALONSO, Luis Enrique, “Conflicto laboral y cambio social” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales...*, *op.cit.*, p. 408. Y citaba a continuación un conocido texto de Fernández de Castro, en donde se concluiría: «Todo ello en una atmósfera cargada de un cierto dramatismo y sensación de psicosis colectiva». FERNÁNDEZ de CASTRO, Joaquín, “Una aproximación sociológica a la reconversión industrial”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), p. 421.

³⁴ BABIANO, José y MOSCOSO, Leopoldo: “Los conflictos sociales...”, *op.cit.*, p. 132.

³⁵ «En suma, optaran los trabajadores bien por una estrategia radical o bien por otra que combinase desde el principio la protesta con la negociación, los objetivos de mantenimiento de empleo jamás se lograron y las condiciones de trabajo, por lo general, quedaron también afectadas. Se impone, en consecuencia, una conclusión: los trabajadores se batieron en retirada». *Ibidem*, p. 168. Tesis está apoyada por, SOTO CARMONA, Álvaro, “Conflictividad social y transición sindical” en TUSELL, Javier, y *id.* (eds.), *Historia de la...*, *op.cit.*, pp. 363-408.

disfrutado de una escasa atención³⁶. Lo anterior, se observa más claramente cuando nos referimos al periodo democrático –al menos entre 1978/1979 hasta los años 1992/1994– en donde la bibliografía disponible es bien más escasa.

Pero junto a este *pobre* estado de la cuestión, que en lo básico se ha limitado a contabilizar el número de conflictos, a establecer sus fases y, por último, a destacar ante todo las huelgas generales por encima de otros conflictos regionales o menores en términos mediáticos; se ha tendido, una vez más, a minusvalorar el impacto social, político y económico del ciclo de huelgas de mediados de los años ochenta. Demasiados apegados a modelos teóricos apriorísticos –y casi siempre tomando por referencia exclusiva las tesis de Kondratiev o Screpanti³⁷– los investigadores que se han dedicado a estas labores en pocas ocasiones han procedido a pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo³⁸. De hecho, no es infrecuente encontrar posibles divisiones y subdivisiones de periodos de huelgas laborales en base a la contabilización de huelgas por años o la participación de trabajadores en las mismas. Sin duda es un posible recurso para esquematizar o aclarar algunas cuestiones, pero confiarlo todo en esa estrategia analítica puede conducir a obtener un cuadro incompleto³⁹.

Es decir, en términos generales, no se ha pasado a valorar el significado del notable y amplio conjunto de experiencias de lucha durante la primera legislatura socialista. Tampoco puede descartarse como una poderosa razón para explicar la escasa trascendencia dada a este ciclo conflicto, la sobre-atención que han acaparado los diferentes procesos de concertación social⁴⁰. Relacionándose, en no pocos casos, de forma unidireccional a modo de *causa-efecto* conflictividad y los acuerdos corporativistas. Una vía que nos abre no pocos caminos de aproximación, pero que tampoco aporta otros elementos de análisis sobre las dimensiones históricas de la conflictividad laboral en tiempos democráticos⁴¹. E igualmente, una tercera

³⁶ Véase en la *Presentación*, *nota 36*, *nota 120*, *nota 123*, así como el apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinarias” y el apartado “3.3. Debates, lecturas, controversias en torno al *nuevo* movimiento obrero en la España de la segunda mitad del siglo XX: un cuestionamiento de los grandes consensos historiográficos”, y en concreto dentro de ese mismo apartado la *nota 316*.

³⁷ En concreto, KONDRATIEV, Nikolai y GARVY, George, *Las ondas largas de la economía*, Madrid, Revista de Occidente, 1945 [téngase presente que la referencia más empleada es, id, “The Long Wages in Economic Life”, *Review of Economic Statistics*, nº 17, (1935), pp. 105-115]; y, SCREPANTI, Ernesto, “Los ciclos largos en la actividad huelguística: una investigación empírica”, *Historia Social*, (1989), nº 34-35, (1989) pp. 51-75 [originalmente publicado en, “Long Cycles in Strike activity: an empirical investigation”, *British Journal of Industrial Relations*, vol. XXV, nº, (1987), pp. 99-124].

³⁸ Así lo expresarían tanto Babiano como Moscoso: «Estamos persuadidos de que no solamente el número, sino también la naturaleza y el resultado de la confrontación nos informa acerca del comportamiento del conflicto social en fase depresiva». BABIANO, José y MOSCOSO, Leopoldo: “Los conflictos sociales...”, *op.cit.*, p. 157. Por lo demás, véase, SOTO CARMONA, Álvaro, “El ciclo largo de conflictividad social en España (1968-1986)”, *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, nº 2, (1991), pp. 157-179.

³⁹ Por ejemplo, una división de este tipo realizaría Miguel Ángel García Calavia en un trabajo ampliamente conocido. Así establecía tres posibles situaciones en relación a la participación de miles de trabajadores por huelga, la llamada magnitud media: «1º) cuando el promedio de trabajadores supera la cifra de 2000 anuales por cada huelga registrada; 2º) Cuando se encuentra entre 1000 y 2000, más cerca de la primera que de la segunda; y 3º) cuando no supera los 1000». GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales en el estado español (1976-2005)”, *Arxius*, nº 18, (2008), p. 100.

⁴⁰ Nos remitimos aquí a lo apuntado en el apartado “2.2.3. Estudios y aproximaciones a la concertación social, la negociación colectiva, la política de rentas y las reformas del mercado de trabajo”.

⁴¹ Por ejemplo, para Soto Carmona el denominado ‘repunte’ se debería, en lo básico, a la falta de acuerdos como al proceso de *integración sindical*: «Sirva de ejemplo de esta última afirmación que la punta huelguística de 1984 se explica por ser el único año desde 1980 que no se alcanza por parte sindical ningún acuerdo general con el gobierno y/o patronal. Téngase en cuenta que mientras que el porcentaje de los huelguistas sobre las plantillas convocadas a las huelgas es alto entre 1976-1979 al situarse en un

razón, se vincula, de forma necesaria, con los paupérrimos resultados de las huelgas y demás conflictos de este tiempo, y que, posteriormente, daría lugar a lo que en más de una ocasión hemos denominado como la “cultura de la derrota” de un nuevo-viejo movimiento obrero⁴².

Una *cultura de la derrota* que no sólo ha de vincularse a los resultados finales de los conflictos, sino al cambio estratégico que experimenta en tal tiempo el movimiento obrero: el paso de la *ofensiva* a la *defensiva*, tanto en sus objetivos y reivindicaciones como en sus estrategias. Un proceso, además, que no es exclusivamente nacional sino internacional como destacó en su momento la profesora Bervely Silver⁴³, y que viene a coincidir, en paralelo, con una crítica en el plano académico a la historia social obrera más militante o simplemente más comprometida⁴⁴. En este sentido, los datos aportados en una obra prácticamente desconocida en España, titulada *Strikes around the World, 1968-2005*, ayuda a comprender las dinámicas intrínsecas de todo este periodo histórico⁴⁵.

Sin embargo, y como venimos destacando, es exactamente durante esta primera mitad de los años ochenta cuando se producen algunos de los conflictos obreros más significativos de todo el último tercio del siglo XX a nivel internacional. Dos ejemplos: la huelga de los mineros en Gran Bretaña⁴⁶ o la también huelga de los trabajadores en la fábrica de Poissy de Talbot en Francia⁴⁷. Lejos en cuanto a los propios objetivos y estrategia, e inclusive en términos estéticos con lo sucedido en los setenta en la fábrica de Fiat en Turín, los mismos vienen a cerrar un muy relevante ciclo internacional de protestas obreras⁴⁸.

11.2.1. El mapa del conflicto obrero: datos, interpretaciones y demás evidencias del «caso español» en perspectiva internacional

Pero volviendo a lo que aconteció en España durante 1984, prestaremos una especial atención al primer trimestre de aquel año: entre enero a marzo, deteniéndonos, de forma específica, en el sobresaliente repunte conflicto de inicios del mes de febrero. Ahora bien, antes

67,2%, aumento que coincide con el de mayor afiliación sindical, sufre un drástico descenso entre 1980 y 1985 al situarse tan sólo en el 38,5% próximo a la dictadura de Franco». SOTO CARMONA, Álvaro, “El ciclo largo...”, *op.cit.*, p. 166. Dicho esto, en primer lugar, consúltese aquí el estudio central al respecto, a pesar de haberse publicado a finales de los años ochenta: MARTÍNEZ ALIER, José y ROSA JUSMET, Jordi, “Economía política del...”, *op.cit.*. Todo ello junto con, MIGUÉLEZ, Faustino, “Sindicalismo y conflicto social en la España de la transición”, *Mientras Tanto*, nº 24, (1985), pp. 19-44. Otra visión complementaría en: RODRÍGUEZ-RATA, Alexis, “La moderación sindical en la transición española: ¿interés corporativo o de clase?”, *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales*, nº 2, (2011), pp. 146-161. Y desde una perspectiva jurídica, BAYLOS, Antonio, “Institucionalización sindical y prácticas neocorporativistas. El caso español: 1977-1987”, *Revista de Trabajo*, nº 91, (1988), pp. 9-21. Y unos años antes, RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “Negociación colectiva y acuerdos sociales”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), pp. 282-301.

⁴² Nos remitimos aquí a las tesis mantenidas en su momento en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*.

⁴³ SILVER, Beverly J., *Fuerzas de trabajo...*, *op.cit.*.

⁴⁴ Recuérdense las tesis mantenidas por, HOBSBAWM, Eric J., “¿Adiós al movimiento obrero clásico?” en *Política para una...*, *op.cit.*.

⁴⁵ VAN der VELDEN, Jacobous H. A., VAN der VELDEN, Sjaak, DRIBBUSCH, Heiner y LYDDON, Dave, *Strikes Around the World, 1968-2005: Case-studies of 15 countries*, Amsterdam, Aksant, 2007.

⁴⁶ Junto con lo apuntado en el Capítulo 6, *nota 37*, véase el ilustrativo, Reportaje, Carlos Mendo, “Mucho más que una huelga”, *El País*, 3 de marzo de 1985.

⁴⁷ Véase lo apuntado en la *nota 63*.

⁴⁸ Véanse aquí, primero, COSSALTER, Fabrizio, “Quaderni Rossi: entre teoría y praxis de la autonomía obrera” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *La clase trabajadora...*, *op.cit.*, pp. 281-289; junto con la bibliografía apuntada en el Capítulo 3, *nota 301*.

de entrar en los datos *puros y duros* y de proceder a establecer un provisional *mapa del conflicto obrero*, cuanto menos han de destacarse un conjunto de características que, a nuestro juicio, son relevantes tanto de cara a sintetizar las señas de identidad del propio ciclo en sí, como a la hora de revelar su trascendencia histórica.

En primer lugar, una característica fundamental de este tiempo –que, gran medida, define al mismo ciclo de protestas– es la confluencia de diferentes tipologías de conflicto en un mismo espacio temporal y local: a las reivindicaciones estrictamente salariales a través de la negociación de miles de convenios colectivos tras la ausencia de un AI'84, vendrá a sumarse una conflictividad laboral motivada tanto por la crisis económica como los primeros pasos del proceso de desindustrialización. A lo que ha de añadirse también una conflictividad social que en parte *bebe* de todos y cada uno de los anteriores procesos, lo que se terminará constituyendo en una clara muestra de rechazo al sistema económico en sí. El segundo gran rasgo identificador de este ciclo ya se ha destacado: su *perfil defensivo* tras la ofensiva obrerista de mediados y finales de los setenta.

En tercer término, ha de reseñarse el amplio repertorio de instrumentos de lucha y de presión: desde las clásicas huelgas fabriles y de sectores –tanto a nivel local, regional como estatal–; huelgas de hambre; encierros; manifestaciones; jornadas de lucha: marchas a Madrid... Sumado a una muy importante novedad en términos históricos: la vuelta, en ocasiones, a un tipo de conflicto obrero violento que gira fundamentalmente en torno a la defensa a ultranza de la producción fabril, dominada por el varón, blanco y con mono azul como una de las últimas expresiones del obrerismo clásico⁴⁹. Pero mucho más allá de la estética este ciclo conflictivo, el mismo supone una clara ruptura con el modelo de lucha fundado por las Comisiones Obreras –el sindicato del antifranquismo por excelencia–. Justamente, aquel *sindicalismo de nuevo cuño*⁵⁰, se caracterizaría, en términos históricos, por la renuncia a la violencia como instrumento de lucha⁵¹. De este modo, en esta misma etapa por parte de sectores del movimiento obrero se vuelve a justificar y por tanto a emplear la violencia –física o no– como una legítima herramienta de conflicto. Todo ello también a través de un amplio repertorio: desde el corte de carreteras, la quema de neumáticos o los clásicos y frecuentes enfrentamientos con las fuerzas del orden público, a las ocupaciones de fábricas, fincas o inclusive secuestros de patrones y funcionarios. Un repertorio diversificado y que se encuentra vinculado con la cuarta característica de este ciclo: su dimensión inicial regional pero con lazos con el resto de los lugares del país. Una *regionalización* del conflicto que, a la postre, devendrá en unas de las principales debilidades de esta oleada conflictiva, en tanto se podría ir aislando conflicto por conflicto.

Otro de los flancos frágiles de este ciclo de protestas será la evidente división sindical entre los dos principales sindicatos de clase del país –UGT y CCOO–. Una división cuando no un enfrentamiento directo detallado en páginas anteriores, que explica, en un buen número de casos, los resultados finales. Pero también ha de indicarse que más allá de las dificultades orgánicas y estratégicas por las que pasan en este tiempo tanto el sindicato socialista como el sindicato comunista, no pocos conflictos regionales estarán protagonizados por otros sindicatos de clase o no –como pueden ser la Intersindical Galega o el SOC en el caso de Andalucía⁵²–.

⁴⁹ Unas notas críticas al respecto pueden encontrarse en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “«Nuestros queridos obreros»”, *Mundo Obrero*, nº 201, (2008).

⁵⁰ Expresión en su momento acuñada por, SARTORIUS, Nicolás, *El sindicalismo de nuevo tipo: ensayos sobre Comisiones Obreras*, Barcelona, Laia, 1977.

⁵¹ Junto con lo apuntado en el Capítulo 3, *nota 186, nota 187 y nota 188*, véase, de forma, específica: ERICE, Francisco, “Estrategias, debates y divergencias en el movimiento obrero y sindical en el último franquismo” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*.

⁵² Véase para el caso del SOC, el libro que recorre la trayectoria política de uno de los principales líderes jornaleros: RECIO MARTÍNEZ, Joaquín (coord.), *Diego Cañamero, el hombre con los pies en la tierra*, Sevilla, Atrapasueños, 2010.

Debilitado profundamente el sindicalismo libertario tras su breve reaparición en los setenta⁵³, lo que asimismo se puede observar es un resurgir del movimiento autónomo. Un movimiento autónomo que terminará desbordando en no pocas ocasiones a las direcciones de CCOO y de UGT hasta marcar la agenda política, y, por tanto, sacando de sus cauces habituales la resolución de los conflictos obreros.

Dicho todo lo anterior, ¿qué nos dicen los datos? ¿Son capaces de visualizar por sí mismos la intensidad, profundidad y dramatismo de este ciclo de protestas? ¿Se corresponden los datos de 1984 a la extensión del conflicto obrero, tal y como se ha mantenido en páginas anteriores? ¿Con los datos en la mano se puede hablar ya no sólo conflicto casi generalizado sino también de una crisis del *Sistema* en general? O por el contrario, ¿se trataría a lo sumo, como defendería Miguel A. García Calavia, entre otros, de un *rebrote significativo* o de un *revival aislado* según Babiano y Moscoso en base a las tesis de Screpanti?⁵⁴ En suma, ¿hasta dónde alcanza el mero análisis cuantitativo? Desde este mismo ángulo de visión –en torno al que escasean los estudios aunque no falten los *consensos académicos*⁵⁵– partiremos desde una doble perspectiva: la internacional y la nacional.

A nivel internacional como sucede en el caso de la medición del desempleo, de la inflación... y un largo etcétera, la metodología propia de cada país introduce una cantidad de variables sustancialmente diferentes, que, en la práctica, imposibilita lo que bien pudiera definirse como un análisis cuantitativo puro, a partir de una práctica de recogida de datos similar. Así pues, en esta tesitura homogeneizadora se ha procedido a consultar la amplia base estadística de la Organización Internacional del Trabajo –Laborsta-OIT⁵⁶–. Sin duda, se está ante una de las más amplias bases de datos referencia mundial –con datos para más de 200 países y en el apartado sobre *huelgas y cierre patronales* con referencias para 93 países–. A lo que se añade para su empleo una poderosa razón: pues a partir de la normativa referencial de la OIT cada país, a través de los procesos de ratificación de las *normas internacionales de trabajo* –a nivel jurídico, en forma de Convenios o simplemente de Recomendaciones– se comprometen a aportar no sólo datos sino aplicar una metodología similar⁵⁷. Lo anterior en la teoría, pues en la práctica la propia Laborsta-OIT presenta, finalmente, una variación considerable en relación a los datos que aquí nos interesa⁵⁸. E igualmente se ha utilizado la muy

⁵³ Véase, de nuevo, Capítulo 3, *nota* 301.

⁵⁴ GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales...”, *op.cit.*, p. 100; BABIANO, José y MOSCOSO, Leopoldo: “Los conflictos sociales...”, *op.cit.*, p. 150. Es relevante destacar, como hemos apuntado, como para dos de los grandes conocedores de esta temática, nos referimos tanto al propio García Calavia como a David Luque, lo sucedido en 1984 apenas suscitará mayores comentarios. Así por ejemplo, este último autor se limitaría a señalar –dentro de las *imágenes-fuerza* tradicionales–: «El año 1984 fue más conflictivo de esta etapa por la concurrencia de diversos conflictos de gran calado en diversas industrias en reestructuración». De nuevo, se constata, pues, los límites de ciertos análisis sociológicos. LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010, p. 14.

⁵⁵ Desde una perspectiva crítica junto con el trabajo de, LACALLE, Daniel, “Conflictividad laboral y...”, *op.cit.*, véase también, MORÁN, Agustín, “Auge y crisis de los grandes acuerdos sociales de los 80” en *Nuevas tendencias de la Negociación Colectiva*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, n° 9, (1986), pp. 13-55.

⁵⁶ Toda la información disponible se puede consultar en: laborsta.ilo.org/default_S.html.

⁵⁷ Junto con todo lo apuntado en la *nota* 2, véase además las normas adoptadas y ratificadas por España de la OIT en: www.ilo.org/public/spanish/region/eurpro/madrid/about/convenios.htm. Véase aquí el sintético como aclaratorio trabajo de, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología...*, *op.cit.*, y en concreto en el apartado, “Las estadísticas de huelgas en España” (pp. 3-4).

⁵⁸ A modo de ejemplo, véanse –en el *Anexo estadístico*– en la *Tabla 162*, *Tabla 163* y la *Tabla 164*, junto con las notas metodológicas que les acompañan en relación a la muy variable procedencia de los datos. De hecho, tenemos hasta cuatro *tipos* a la hora de catalogar las fuentes de información: a)

rara vez empleada base de datos Labour Disputes del Eurostat, incluida dentro de la gran Labour Force Survey⁵⁹. Basada en la metodología de la Laborsta-OIT se ha empleado como complemento para verificar algunos pequeños desajustes así para introducir series revisadas y establecer lo más homogéneos datos posibles en relación a la UE-15⁶⁰.

Visto todo lo anterior, y ahora sí, ¿qué nos dicen las estadísticas sobre conflictividad a nivel internacional desde una perspectiva a medio plazo? Si nos detenemos tanto en la *Tabla 162* como en el *Gráfico 33*⁶¹, que presentan una evolución del número de huelgas y del cierre patronales en un elevado número de países occidentales, incluidos los integrantes en la UE-15, a lo largo de un periodo de veinte años, entre 1976 a 1996, de inmediato resaltan tres grandes fases: a) en primer lugar, entre 1976 a 1980/1981 se asiste a un relevante ciclo de conflictividad, que en el caso de algunos países mediterráneos –Francia, Italia o España– junto con el Reino Unido, Australia, Japón o la excepción nórdica de Finlandia en este caso, presentan un muy considerable número de huelgas. O dicho con otras palabras: se tratan de altos niveles en términos huelguísticos en perspectiva histórica. De hecho, aquí también cabría la posibilidad de incluir a los siempre *olvidados* Estados Unidos cuando se habla de este tipo de asuntos, pero problemas de orden metodológico y de longitud de las propias series estadísticas a la hora de evaluar este preciso caso, desaconsejan aventurarnos por tales terrenos⁶². Una segunda fase podría llevarse –a grandes rasgos– entre 1981/1982 a 1985-1986. Periodo que viene a representar el final de todo un ciclo de conflictividad que había marcado los anteriores citados records históricos. En esta misma etapa, y a pesar de que ya se acusa un relativo descenso de la conflictividad, todavía se pueden observar casos ilustrativos de grandes movimientos huelguísticos. Por ejemplo, Francia, Reino Unido o nuevamente Finlandia⁶³. Finalmente, una tercera fase se podría abrir a partir de 1986, en donde ya se observa más claramente la fase crítica bajista con respecto a la conflictividad huelguística. Asimismo, por otro lado, ha de remarcarse el caso de lo que bien podría denominar –si damos por válidos los datos expuestos en la citada tabla– como los “reinos de la paz social”: Austria, Luxemburgo, Países Bajos o Suecia. Aunque este trabajo finalizada en 1996, esta última fase se podría extender, en la práctica, hasta el presente, estando caracterizado el mismo de forma clara por un descenso generalizado, abrupto en no pocos casos, tanto en Europa como en Oceanía como en Asia como en América. En realidad, nos hallamos frente al final de todo un tiempo histórico en este sentido.

Registro de organizaciones de empleadores/trabajadores; b) Registro de relaciones laborales; c) Recolección especial de datos; o d) Fuente ignorada.

⁵⁹ Toda la información puede localizarse en: epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/labour_disputes.

⁶⁰ Tanto o más interesante también, aunque para un tiempo cronológico que desborda nuestras fronteras cronológicas son los datos aportados en el, European Industrial Relations Observatory [www.eurofound.europa.eu/eiro/].

⁶¹ Todos y cada uno de las tablas y gráficos señalados en este apartado se localizan directamente en el *Anexo estadístico* de esta investigación.

⁶² Así por ejemplo, a partir de los datos de Laborsta-OIT, si para el año 1977 tomamos como punto de partida la fuente titulada: “Recolección Especial de Datos” tan sólo tendríamos contabilizadas 231 huelgas. Ahora bien, si hubiéramos tomado como válida la base de datos titulada “Fuente Ignorada” recogida también por Laborsta-OIT para los años 1976-1981, el número de conflictos asciende a 5.506. Una diferencia sobresaliente que se repite en los cinco años de los que se tiene información a partir de esta misma base de datos.

⁶³ De notable interés puede resultar acercarse a, COMUNIDAD EUROPEA, “La evolución de los conflictos laborales en la Comunidad Europea”, *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, nº 10, (1993), pp. 139-143. Y más recientemente, OCHEL, Wolfgang and SELWITSCHKA, Markus, “Labour dispute rules and strikes in the European Union”, *Cesifo Dice Report*, nº 2, (2003), pp. 63-66; BORDOGNA, Lorenzo, “Strikes in Europe: still a decade of decline or the eve of a new upsurge? *Indian Journal of Industrial Relations*, vol. XLV, (2010), pp. 646-657.

Asimismo tanto la *Tabla 162* como en el citado *Gráfico 33*, presentan dos cuestiones que con demasiada “alegría” se suelen pasar por alto. La primera de carácter –digamos– técnico. Como afirmó hace muchos años Michael Shalev en un conocido artículo en el que invitaba a desconfiar plenamente de las estadísticas estatales, advertía de lo siguiente:

«Estado no es un agente neutral en la recopilación estadística, y menos en lo relativo a la actividad huelguística [...], entre otras razones, porque según las circunstancias (y la coyuntura) puede tener propensión a sobredimensionarla o minimizarla, es decir, a manipular, también a estigmatizarla, tanto más cuanto menos democrático es su funcionamiento»⁶⁴.

La segunda reflexión de calado, la señaló más recientemente el sociólogo marxista Daniel Lacalle cuando venía a aportar un *grano de sensatez*, a la hora de interpretar adecuadamente el significado de las huelgas, de los conflictos laborales:

«[N]i ahora ni nunca la huelga, ha sido o es el conflicto laboral normal en el capitalismo, ni tampoco el dominante, de hecho en toda la historia del movimiento obrero la huelga ha sido una herramienta extrema dentro de los límites estrictamente económicos y siempre ha partido y se ha visto acompañada de multitud de movilizaciones de todo tipo, es decir, lo que es normal en toda la historia del capitalismo es el trinomio negociación-movilización-huelga con diferentes grados y combinaciones en cada una de esas escalas»⁶⁵.

Presentada esta serie de *matizaciones* se puede llegar a interpretar de forma mucho más correcta, en términos históricos, la extraordinaria importancia de este cambio reciente de nuestro presente vivido: el descenso mundial generalizado de la conflictividad laboral, a partir del final del ciclo de mediados de los años ochenta. Todo un proceso histórico que se visualiza de forma meridiana en el *Gráfico 33*. En el citado *gráfico* se han seleccionado un conjunto de países a una escala prácticamente mundial. No es casual la selección de los mismos, pues en su inmensa mayoría son aquellos con mayores niveles de conflictividad con un par de *excepciones* en la que ahora nos detendremos. En un interesante número del *The Economist* en 2005, más allá de señalar que España seguía siendo el tercer país en número de jornadas de trabajo perdidas durante la última década, destacaba como a la cabeza se situaba Dinamarca y Canadá –en primer y segunda posición, respectivamente (véase aquí también los significativos datos apuntados en la *Tabla 165*)–. Dos países caracterizados generalmente identificados con la “paz social” y con unos niveles medios-bajos en términos de conflictos laborales; y que una vez cerrado el alto ciclo de conflictividad entre 1976 a 1986, romperían suavemente con la tendencia decreciente en número de huelgas. Así pues, su incremento en términos de conflicto no supone ningún de repunte en términos de conflicto a destacar. ¿Excepciones a la regla general? A buen seguro, debería rebuscarse en términos locales las causas.

Con todo, lo anterior no modifica lo que bien se puede denominar como los tres factores explicativos para internarnos por un conjunto de interpretaciones a la hora de explorar esta explicar transcendental cambio histórico delineado en páginas anteriores. La primera gran explicación –al igual que las restantes forman parte de los grandes *consensos académicos* de nuestro tiempo– se sustentaría en base al declive del conflicto industrial obrero típico de buena parte del siglo XX. Un *declive* que mucho tiene que ver, en términos planetarios, con las transformaciones de los modelos de producción durante la última mitad del mismo siglo⁶⁶. Una

⁶⁴ SHALEV, Michael, “Mentiras, mentiras detestables y estadísticas de huelga: medición de las tendencias del conflicto laboral” en CROUCH, Colin y PIZZORNO, Alessandro (comps.), *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa Occidental a partir de 1968*, II vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1968, vol. I, pp. 27-40, citado en la versión en castellano por, GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales...”, *op.cit.*, p. 97. Igualmente véase la versión original de este conocido texto en, SHALEV, Michael, “Lies, Damned Lies and Strike Statistics” and “Problems of Strike Measurement” en CROUCH, Colin y PIZZORNO, Alessandro (eds.), *The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968*, II vols., London, Macmillan, 1978, pp. 322-334.

⁶⁵ LACALLE, Daniel, “Conflictividad laboral y...”, *op.cit.*, pp. 55-56.

⁶⁶ Véase la amplia bibliografía apuntada en su momento en el apartado “2.2.4. El mundo del trabajo y las relaciones laborales: un balance generalista”.

segunda gran causa, junto a la propia pérdida de centralidad de las relaciones capital-trabajo bajo la tradicional mirada conflictiva, sería, en paralelo, el declive de un viejo movimiento obrero que alcanzaría metas históricas considerables durante el mal llamado “consenso socialdemócrata”. El tercer factor de este declive huelguístico lo constituye la llegada de los gobiernos conservadores y ultraliberales de Reagan y Thatcher, quienes van afrontar duras batallas contra el movimiento obrero, obteniendo, de hecho, notables victorias, que empiezan un 5 de agosto de 1981 cuando el presidente de los Estados Unidos despidiera a todos los afiliados del sindicato de Controladores del tráfico aéreo (PATCO)⁶⁷. Declarado ilegal el sindicato, militarizado el control aéreo de los Estados Unidos, tal decisión se convertiría en un claro mensaje contra las pretensiones del movimiento obrero, pero sobre todo se constituiría en un poderoso *golpe de efecto*. O dicho de otra forma: a partir de entonces al movimiento obrero se le combatiría con todas las armas –legales o ilegales– al alcance del Estado. Téngase presente el caso de los *mineros británicos* quienes tan sólo serían derrotados después de meses de duras y violentas luchas, y en donde se llegaría a emplear inclusive a los servicios secretos para tales tareas. Por tanto, cabe interrogarse frente a ciertas tesis: el final de la conflictividad obrera, ¿es producto de la desmovilización sindical? O bien, ¿es el resultado de una *derrota histórica*?

De esta forma, se asiste a todo un conjunto de procesos interconectados –cambios en el modelo productivo, final del *consenso socialdemócrata* junto con el triunfo de la Escuela de Chicago, o el mismo lento declinar de la centralidad política de un viejo movimiento obrero– que juntos pero no revueltos estarían detrás del abrupto descenso de la conflictividad laboral, que había sido causa de preocupación para no pocos gobiernos occidentales, a la par que de reforzamiento de la cuestión social durante todo este tiempo. Un cierre de ciclo, un cierre de una etapa histórica, que igualmente puede constatare en la *Tabla 163* y en la *Tabla 164*. Allí se presenta la evolución del número de trabajadores implicados en huelgas laborales así como los días no trabajados por huelgas para los mismos países y el mismo tiempo cronológico. Prácticamente se pueden extraer las mismas conclusiones. Con descensos más acusados –caso de España– o menos acusados –Francia o Italia– y con excepciones singulares como Alemania, las tesis aquí mantenidas quedan ampliamente refutadas.

Sin perder esta perspectiva internacional es hora ya de aplicar el *zoom* en diferentes escalas a la realidad propiamente nacional. En este mismo terreno, también las fuentes a emplear son conflictivas. Principalmente, a nivel cuantitativo, contamos con dos: la procedente del Ministerio de Trabajo en su elaboración de su Anuario de Relaciones Laborales; y la procedente de la propia CEOE. El siempre *pobre y débil* sistema estadístico español en este caso no es una excepción hasta tiempos muy recientes. La herencia del franquismo, de hecho, es considerable.

Más allá de todo lo remarcado y explicado en anteriores apartados sobre tales problemas, la historia institucional de las estadísticas de huelga en España se encuentra perfectamente descrita en uno de los múltiples trabajos al respecto de David Luque –“Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura”⁶⁸–.

Por tanto, puede resultar de interés, partiendo una vez más de las ideas de Michael Shalev⁶⁹ y de otros tantos *críticos*⁷⁰, tener presente varios hechos históricos a la hora de calibrar

⁶⁷ Véase aquí la *carta* publicada por el cineasta norteamericano, MOORE, Michael, “Hoy hace 30 años: el día en que murió la clase obrera”, *Rebelión*, 7 de agosto de 2011.

⁶⁸ LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología...*, *op.cit.*.

⁶⁹ SHALEV, Michael, “Mentiras, mentiras detestables y estadísticas de huelga: medición de las tendencias del conflicto laboral” en CROUCH, Colin y PIZZORNO, Alessandro (comps.), *El resurgimiento del...*, *op.cit.*.

la *calidad* y la *cantidad* en relación a este tipo de estadísticas. En 1963, en tiempos de una muy tibia apertura reformista de Fermín Sanz-Orrio (1962-1969) como Ministro de Trabajo, se comenzaría a recoger, a partir de la aprobación del Decreto 2354/1962, de 20 de septiembre, *sobre procedimientos de formalización, conciliación y arbitraje en las relaciones colectivas de trabajo*⁷¹, los primeros datos sobre huelgas. No hace falta ser un experto en franquismo así como en el mundo del trabajo para *sospechar* del claro sesgo que, en aquel tiempo, tenían las estadísticas, siempre sujetas no sólo a intereses políticos –aspecto que bajo otras formas y procedimientos ha continuado en tiempos democráticos– sino a las más evidentes manipulaciones. Con una nota destacada: el franquismo nunca reconocería la sola posibilidad de *huelgas políticas*⁷². Además, la normativa llegaría en un tiempo en que un “nuevo” movimiento obrero comandado por las Comisiones Obreras empezaría a hacer acto de presencia en las fábricas. Una presencia que se saldaría con una enorme represión antes y después de la “ilegalización” de las propias CCOO, quien entre 1963 y 1977 vería condenados a más de 9.000 de sus militantes. Por tanto, siendo los sindicatos democráticos ilegales, perseguidos y represaliados, lógicamente, la contabilidad de las huelgas consideradas “legales” durante el franquismo debe, en suma, cuestionarse seriamente.

En el inicio del ciclo conflictivo a mediados de los setenta y cuando la crisis económica empezaba a evidenciarse, a la par que la crisis política terminal del régimen franquista se aceleraba, se aprobaría un 22 de mayo el Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo, *sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo*, que avanzaba muy parcialmente en una semi-legalización de las huelgas⁷³. Una normativa pre-constitucional de matiz reformista pero tan de poca trascendencia jurídica como la posterior LRL. De hecho, no sería hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 17/1977 –consúltese su capítulo 1, y dentro de ahí sus artículos del 1 al 11– cuando se establecería el marco por el que todavía hoy se rigen la convocatoria de las “huelgas legales”⁷⁴.

Aunque mucho cabría hablar y discutir en el terreno jurídico y político en torno a la legalidad y/o ilegalidad de una huelga en una economía de mercado, en lo que nos interesa, en términos estadísticos y metodológicos, se ha consultado, en primer lugar, el *Anuario de Estadísticas del Trabajo* de la OIT –Laborsta-OIT– como ya se ha dejado apuntado, así como los datos ofrecidos por el *Anuario de Estadísticas* del Ministerio de Trabajo para los años 1976 a 1979, teniendo también presente las matizaciones, revisiones y demás comentarios de no pocos especialistas en el tema⁷⁵. Para el siguiente lustro, entre 1980 a 1985, se ha empleado el

⁷⁰ Véase lo apuntado en el Capítulo 2, *nota* 602.

⁷¹ Decreto 2354/1962, de 20 de septiembre, *sobre procedimientos de formalización, conciliación y arbitraje en las relaciones colectivas de trabajo* [B.O.E. 24 de septiembre de 1962].

⁷² Sobre todas estas cuestiones, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Delincuentes políticos: biografía de una «generación de militantes antifranquistas»” en id. (coord.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*.

⁷³ Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo, *sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo* [B.O.E. 28 de mayo de 1975]. Véase aquí, GARCÍA MURCÍA, Joaquín y CASTRO ARGÜELLES, M^a Antonia, *Legislación histórica sobre huelga y conflicto colectivo de trabajo*, Navarra, Aranzadi, 2011.

⁷⁴ Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, *sobre Relaciones de Trabajo*. Junto con libros como los ya citados de, CASAS BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y APARICIO TOVAR, Joaquín, *Legislación de huelga...*, *op.cit.*; y la bibliografía sobre el intento de legislar el Derecho a la Huelga a principio de los noventa –véase, Capítulo 8, *nota* 326–; véanse NUGENT, Ricardo, “La Constitución y el derecho de huelga”, *Derecho Laboral*, vol. XXVI, n^o 130, (1983), pp. 223-240; BAYLOS, Antonio, *Derecho de huelga y servicios esenciales*, Madrid, Tecnos, 1987; PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel-Carlos, “El derecho constitucional de huelga y su regulación en España”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, n^o 17, (1993), pp. 51-57; y, DURÁN LÓPEZ, Federico, *Jurisprudencia constitucional y derecho del trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

⁷⁵ Véase lo apuntado en la *nota* 66.

Boletín de Estadísticas Laborales también del Ministerio de Trabajo⁷⁶. Y para el resto del periodo, se cuenta con la valiosa *Estadística de Huelgas y Cierres Patronales* (EHCP) del INE. Precisamente, en 1986, desde el Ministerio de Trabajo se procedería a la adopción y homologación de la metodología del OIT, así como se revisarían y se ampliarían los campos de la citada encuesta⁷⁷.

Ahora bien, como se puede percibir de lo anterior la “fiabilidad” real de los datos en torno a las huelgas “legales” –prácticamente para todo nuestro tiempo– es bastante relativa, en el momento en que se repasa los vaivenes por los que han atravesado las diferentes bases estadísticas disponibles. Si como acabamos de ver para las fechas extremas cronológicas elegidas en este caso –entre 1976 a 1996 tanto a nivel internacional como nacional– han de combinarse un conjunto de estadísticas de diferente naturaleza metodológica, lo que por sí ya introduce motivos de preocupación; al menos, para el núcleo de nuestro análisis –la primera legislatura socialista con especial atención a los datos para 1984– en realidad contamos con una serie bastante homogénea de datos y que rara vez se han puesto en cuestión. No resulta tan completa como la que se cuenta a partir de 1986, pero sí creemos que pueden considerarse como “válidos” los datos que expondremos, una vez matizada alguna cuestión y sobre todo comparada con otras bases de datos.

En cualquier caso, una seña característica de las estadísticas “oficiales” del Ministerio de Trabajo es su evidente *formalismo*. Nos explicamos. Más allá de la “aversión” de los socialistas en todo lo que tuviera que ver con la EPA o con cualquier estadística potencialmente conflictiva, la normativa para convocar, legalizar y más tarde contabilizar una huelga y/o cierre patronal –a saber el proceso estadístico, en su conjunto– por más que se fuera complejizando y ampliando, desde una perspectiva histórica y/o sociológica siempre se nos aparece como incompleta cuando no insuficiente⁷⁸. Por más que en el cuestionario estadístico la autoridad laboral podía incluir lo que se denominaba una “unidad de huelga” aunque no hubiera comunicación administrativa previa, la diferencia brutal con la otra base de datos que aquí se maneja –la procedente de la CEOE– es tal, que todo parece indicar –como también trataremos de demostrar unas páginas más adelante cuando nos adentremos en los principales conflictos del primer trimestre de 1984– la hipótesis descrita. A saber, y a modo de un primera conclusión provisional, las estadísticas de Trabajo *pecarían* de formalistas al respecto. O dicho con otras palabras, o bien la autoridad laboral de cada región pecaba del citado formalismo al atenerse vehementemente a la normativa dada, o bien, no realizaba su trabajo con el ahínco de los empleadores. No terminan aquí los problemas con los datos oficiales, pues contienen dos importantes lagunas: la primera, la referida para Cataluña para los años 1983 a 1985; y la segunda, el País Vasco para los años 1986 a 1990. En ambos casos no se tiene ningún tipo de datos. Y ello en regiones con tradicionales altos niveles de conflictividad.

Como adelantábamos para cubrir estas notables deficiencias se ha tenido también presente la base de datos de la rara vez transparente CEOE. El acceso a sus principales variables para todo el tiempo estimado se ha producido a través de dos trabajos –la valiosa monografía de recopilación de documentación y datos por parte de la Secretaría Confederal de Formación y Cultura de la CCOO y una vez el trabajo de David Luque⁷⁹–. Se desconoce, de

⁷⁶ Véase lo apuntado en la *nota* 66.

⁷⁷ Junto con toda la bibliografía citada previamente, véase el trabajo analítico de, RODRÍGUEZ CABALLERO, Juan Carlos, “La información estadística sobre el mercado de trabajo”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 71, (2008), pp. 67-98.

⁷⁸ Consúltase la actual concepción del Ministerio de Trabajo e Inmigración al respecto a la hora de contabilizar una huelga y/o cierre patronal en lo que se denomina “Proceso Estadístico y notas explicativas” dentro de la base de datos de EHPC: www.mtin.es/estadisticas/HUE/Hue00/Index.htm.

⁷⁹ COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos...*, *op.cit.*; y, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología...*, *op.cit.*.

hecho, la publicación por parte de la misma CEOE de algún informe completo al respecto, más allá de sus notas de prensa periódicas, o algún que otro documento suelto de muy difícil localización. ¿Qué nos aporta la base de datos de la gran patronal española? En primer lugar, nos viene a resolver el problema de las lagunas de los casos catalán y vasco, a partir de lo cabe suponerse como una serie homogénea de datos proporcionadas. Una *suposición* guiada no en cuestiones metodológicas tan rigurosas como en el ámbito oficial, sino a través del conteo “objetivo” y “eficiente” que cada empresario perteneciente a la CEOE hacía llegar a la sección encargada de elaborar el conjunto estadístico. Aquí, por tanto, la metodología es sustancialmente diferente, aunque difícil sería de catalogarla como “científica”. Científica o no, ha de tenerse muy presente como los “propios sindicatos de trabajadores consideraron en su momento más fiable” la propia encuesta de la CEOE frente a la del MTAS⁸⁰. El *único matiz o pega* que generalmente se ha achacado a las estadísticas de la patronal en este campo, sería su deficiente *modelo* de conteo durante sus primeros años –entre 1977 a 1979-1980– con la ausencia de datos para el extraordinario año, en términos de conflictividad laboral y política, de 1976.

En todo caso –como veremos a continuación– las diferencias siempre al alza por parte de la CEOE frente a las del Ministerio de Trabajo difícilmente se pueden explicar tan sólo por la inclusión de los casos vasco o catalán. Sobre todo cuando se disgregan y se comparan los datos a partir de 1986 con la EHCP. Entonces, ¿por qué de la diferencia entre las estadísticas del MTAS y de la CEOE hasta el punto de prácticamente representar el doble estas últimas tal y como se evidencia en el *Gráfico 34*? Pues como trataremos de explicar y a su vez justificar, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, a buen seguro, una de las virtudes de la serie de datos de la CEOE sea, precisamente, captar mejor, los otros “cauces huelguísticos” fuera de la formalidad con las que lo trata Trabajo. Todavía más, pues esta misma serie de datos nos es especialmente útil para el año 1984 ya que, en nuestra opinión, viene a reflejar la “ilegalidad” y la “espontaneidad” casi diaria de no pocos conflictos repartidos por todo el Estado⁸¹.

En la *Tabla 166* y en la *Tabla 167* pueden visualizarse las principales variables de la conflictividad en España –número de huelgas, trabajadores participantes y jornadas perdidas– tanto a través de las series del Ministerio de Trabajo como de la CEOE, respectivamente. Antes de entrar en más detalles, y tal y como se percibe de mejor manera en el *Gráfico 34*, se observan perfectamente los tres ciclos de conflictividad por los que atraviesa el país en estas más de dos décadas, en donde se entrecruzan dos regímenes políticos y la gran metamorfosis de nuestro modelo productivo. Ciclos o fases que se corresponden –como acabamos de analizar– con la evolución a nivel internacional. Especialmente interesante por su intensidad y magnitud resulta la primera fase durante los años 1976, 1979 y 1980. Tiempos de transición política y sindical, de elaboración y negociación del Estatuto de los Trabajadores y de destrucción acelerada de empleo. La conflictividad en España entonces no sólo alcanza máximos históricos a nivel interno, sino que encabeza la conflictividad laboral a nivel europeo, ocupando también una destacada posición a nivel mundial. Como ha señalado en más de una ocasión Vicenç Navarro:

«Las movilizaciones ciudadanas, y muy particular, las del movimiento obrero, forzaron el fin de la dictadura. Durante el periodo 1973-1978, España vivió las movilizaciones más extensas que hubo en el continente europeo. El número de huelgas ocurridas en nuestro país fue de cuatro a siete veces superior (según el año) al promedio de la Comunidad Europea»⁸².

Una segunda fase se puede llevar hasta el mismo año ochenta y cinco y/o ochenta y seis. A grandes rasgos en estas fechas han de agruparse los conflictos laborales, salariales y sociales directamente vinculados con la última fase de la crisis económica –incluidos los

⁸⁰ MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de...*, op.cit., p. 1203.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² NAVARRO, Vicenç, “La necesaria segunda Transición”, *Público*, 30 de junio de 2011.

procesos de desindustrialización– de los setenta cuya salida en España se retrasará, al menos, un par de años en relación a los países de su entorno. Se está en los peores momentos de la crisis a nivel de destrucción masiva de puestos de trabajo, aunque el balance en materia de inflación y de déficit público presente datos ligeramente mejores que durante los años previos. Por otro lado, ha de tenerse presente como la consolidación sindical se encuentra bastante avanzada. Asimismo en este lustro, la intensidad en número de conflictos sin alcanzar los niveles de la segunda mitad de los setenta se mantiene en un nivel medio-alto con picos considerables durante tres años (1982, 1983 y 1984).

Por último, un tercer ciclo comprendería los años 1986 hasta 1994/1996⁸³. A nivel global, se está ante una nueva fase –en términos históricos– en donde se supera lentamente la crisis económica, con un trienio de fuerte crecimiento económico –1987-1990– para posteriormente cerrarse el mismo con un proceso de enfriamiento de la economía, que terminará con una abrupta crisis económica entre 1993 a 1996. A nivel de conflictividad, lejos se encuentra de la de los setenta, y ello a pesar de que se convocarán tres huelgas generales de por medio. Inclusive en dos años concretos –en 1987 y en 1991, según datos oficiales– se asistiría a un pujante repunte de la conflictividad. Precisamente, tanto en uno como en otro año se está en el preámbulo de un *giro* en la marcha de lo económico, una vez que –ahora sí– si se puede dar por cerrada definitivamente tanto la transición política como sindical. Pero este mismo ciclo que se puede llevar incluso más allá de nuestra fecha extrema cronológica, destaca por el cierre de una etapa con unas pautas, una identidad y todo un conjunto de características, que se podrían identificar con el viejo conflicto industrial. Así lo que sucede en estos años sin ser totalmente nuevo –recuérdense las movilizaciones mineras de principios de los noventa o propiamente los sucesos de 1992 en Cartagena– si presenta *características diferenciadoras*. Y ello, a pesar de que se convocan en menos de seis años tres huelgas generales –todas ellas exitosas, por cierto– que revisten un carácter defensivo y que, en gran medida, son las últimas muestras de una solidaridad de clase forjada en los tiempos de la dictadura y de la transición⁸⁴.

No obstante, y a pesar de este nuevo rumbo que toma la conflictividad laboral, se observa una de las últimas ofensivas del viejo-nuevo movimiento obrero. Una ofensiva con unos objetivos muy concretos y con un carácter cortoplacista. Así pues, si en 1987 se atisban ya los primeros resultados positivos de la salida de la crisis económica en materia de empleo, se genera, al mismo tiempo, tanto por parte de las direcciones de los sindicatos de clase como por un considerable sector de la población asalariada, las bases reivindicativas de lo que, en breve, se conocería el *giro social*. También se trata del primero año sin el *efecto del AES* tras dos años de una relativa “paz social” en donde disminuye la conflictividad laboral –un -49% en 1985 y un -30% en 1986–⁸⁵. Es decir, se modifica en este tiempo el tipo de conflicto y con él uso y el fin buscado de las huelgas. Se pasa, pues, a una ofensiva sindical –limitada en el tiempo como venimos insistiendo– de cara a recuperar parte del poder adquisitivo y reclamar las compensaciones oportunas tras tantos años de *sacrificios*. Nos movemos entre los años 1987 a 1989. De hecho, las huelgas de 1992 y 1994 representan la contracara de este último ciclo conflictivo. Cierre de una fase en el que se retoma una *estrategia defensiva* por parte de las

⁸³ En este sentido, resulta clave el trabajo de, MARCO ALEDO, Mariluz, “El conflicto laboral en España durante el periodo, 1986-1994”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 21, (1986-1994), pp. 209-234. Véase aquí también, LUQUE, David, “Huelgas e intercambio político en España”, *Revista Internacional de Sociología*, (2012) [online].

⁸⁴ Para todas estas cuestiones nos remitimos al apartado “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el *único camino posible* de la economía socialista?”.

⁸⁵ ESTEVE MORA, Fernando y MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE, Rafael, “La política económica...”, *op.cit.*, p. 15.

fuerzas sindicales frente a los fuertes recortes del Estado del Bienestar y las sucesivas reformas laborales contra los derechos laborales más básicos⁸⁶.

Pero adentrándonos ya sin más desvíos de por medio en lo que nos interesa –la especial y conflictiva situación que vive el país al año escaso de las llegadas de los socialistas– el año 1984 sin ser el más numeroso en número de huelgas durante la década socialista (1982-1992) –por tan sólo emplear los siempre datos a la baja del MTAS –así en 1991 se registrarían 1.552 huelgas y en 1984 se contabilizarían 1.498– en cambio sí lo es tanto en trabajadores participantes como en jornadas perdidas. Todavía más, pues aquel año ochenta y cuatro es de largo el más conflictivo –siempre según datos del Ministerio de Trabajo– de la primera legislatura socialista (1982-1984). Pero si afinamos todavía un poco más nuestro ángulo de visión ese mismo año se nos aparece también el más conflictivo ya no sólo de la “década del cambio” sino de los catorce años de los gobiernos socialistas. ¿Por qué? Esto es así cuando procedemos a eliminar el *efecto* de las huelgas generales a nivel estatal, según los datos ofrecidos en un conjunto de estudios⁸⁷. Para el caso de la huelga general de 1985, las cifras son del todo dispares y no se cuenta con un cálculo estadístico consolidado y consensuado⁸⁸. Igualmente se ha eliminado los datos de 1982, ya que carecen de sentido, en términos prácticos, una posible comparación en este marco al llegar al poder los socialistas en el mes de diciembre.

A partir de estas características se ha construido la *Tabla 168*. Así pues, si 1984 no es el año con mayor número de huelgas –por ejemplo en 1983 se contabilizan 46 menos, en 1987 una menos o directamente es superado en más de cincuenta en 1991– se encuentra en una media muy superior a la media –1.498 frente a la media de 1.239 para entre 1983 a 1986 o frente a las 1.176 para entre 1983 a 1996– ocupando un segundo lugar en este escala. Igualmente, es con diferencia donde mayor número de trabajadores participarían en un año sin huelga general a nivel estatal; y el también segundo año también más conflictivo después de 1988 cuando se habla de jornadas perdidas.

Los datos de la CEOE no sólo confirman sino que reafirman con creces todo lo anterior. Si para la primera legislatura no cabe duda de que 1984 es el año con mayor número de huelgas contabilizadas –por ejemplo, 1986 el otro año de aquel periodo con número de huelgas se queda muy por debajo de 1984, a más de ochocientas huelgas contabilizadas– así como en relación al número de huelguistas y las jornadas perdidas; en lo referido tanto a la “década del cambio” como a la época socialista en su conjunto (1982-1996) empleando las citadas estadísticas, a pesar de que se incluyen el efecto de todas y cada una de las huelgas generales a nivel estatal convocadas –1985, 1988, 1992 y 1994–; el año 1984 tan sólo es superado en número de huelgas por las de 1987 –3.194 frente a 3.091– pero en cualquier manteniéndose muy por encima del promedio general –2.383 para entre 1983 a 1986, o, 2.059 para entre 1983 a 1996–; en número de huelguistas solamente en dos años en que se convocaron dos huelgas generales se vería superado en número de huelguistas –1988 con 8.001.100 y 1992 con 7.351.400 frente a los 5.495.500 huelguistas de 1984, que viene a superar en más de dos millones a los participantes en huelgas durante 1987 y en más de un millón a los de 1994, y ello a pesar de la convocatoria de la huelga general del 27 de enero de 1994–; en relación a las jornadas perdidas se sitúa en primer lugar por encima incluso de años tan importantes en este campo como fueron los de 1987 o 1988 y 1992.

Vamos aplicar nuevamente otro *zoom* a nivel estadístico. En el *Gráfico 35*, en el *Gráfico 40*, en el *Gráfico 41* y en el *Gráfico 42*, se ha procedido a trasladar, de forma sintética,

⁸⁶ Nos remitimos al apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

⁸⁷ Véase, aquí, de nuevo, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010, pp. 27 y 28.

⁸⁸ Por ejemplo, CCOO y UGT afirmarían que más de cuatro millones de trabajadores participarían en aquella huelga. El Gobierno lo redujo a un millón y cálculo las pérdidas en algo más de 30.000 millones de las antiguas pesetas.

los principales datos que aportan tanto el MTAS como la CEOE de cara a la primera legislatura socialista. Un conjunto de gráficos que más allá de evidenciar las diferencias radicales entre una y otra encuesta –el doble o el más de doble en cada una de las tres variables aquí consideradas– para el año 1984 nos indica una serie de cuestiones en torno a las que poder interpretar algunas características de la tipología y forma de los conflictos durante aquel año. Vaya, por delante, que de nuevo es tal la diferencia entre los datos del MTAS y de la CEOE, que la hipótesis del excesivo *formalismo* de las encuestas oficiales vuelve a confirmarse. Tal y como se observará en la segunda parte de este capítulo, cuando se examinan los tipos de conflictos, su forma de movilizaciones y demás estrategias de presión, se nos aparecen no pocos de ellos fuera de los “cauces formales” o si se prefiere “legalistas”.

Llegados aquí 1984 sin ser el año más destacado en los dos sub-periodos considerados, sin embargo, una vez que se tienen en cuenta todas las variables hasta ahora observadas, se nos presenta, en conjunto, como el más conflictivo de toda la época socialista nuevamente. Para verificar lo anterior, se ha procedido a calcular el promedio de las principales características de la conflictividad. En la *Tabla 169*, en primer lugar, 1984 en relación al promedio del número de huelgas aparece por encima de todos años considerados, a excepción de lo que ocurre entre los años 1977 a 1982. Otro tanto sucede en la segunda columna –participantes y/o huelguistas– cuando se elimina el *efecto de las huelgas generales*. Incluso aquí los datos que maneja la CEOE para 1984 son superiores para los cuatro periodos de tiempo estimados. Así, por ejemplo, tomando los datos a la baja del MTAS y descontando el efecto de las huelgas generales, frente a los 2.242.200 participantes en huelgas durante 1984, entre 1983 a 1986 la media sería de 1.523.700, y para 1983 y 1996 de 1.563.403. E iguales circunstancias se dan en relación a la contabilización de las jornadas perdidas. En este caso, se toman como referencia los datos de la CEOE que para 1984 presentan 15.259.100 jornadas perdidas, muy superiores incluso para el periodo de 1977 a 1982 –con un promedio de 13.090.600– y todavía más con respecto a 1983 a 1986 –con un promedio de 9.856.950– y más claramente para el periodo comprendido entre 1983 a 1996, inclusive sin descontar el efecto de las huelgas generales –un promedio de 4.357.189 jornadas perdidas–.

Por otro lado, en el *Gráfico 35* se ha promediado el total de huelgas contabilizadas por día para los cuatro periodos de tiempo de este periodo –1977/1982; 1983/1986; 1983/1996; y 1977-1996–. El resultado, una vez más, es concluyente. Con la excepción de los años de la transición, tanto los datos de Trabajo como de la CEOE, el año 1984 se encuentra por encima de los promedios medios. Tomando así los datos de la patronal resulta que de las 8,46 huelgas diarias contabilizadas durante 1984 para el periodo 1983 a 1986 se registraron 6,58, unas cifras, en cualquier caso, muy altas; y para el periodo 1983 a 1996, el promedio de huelgas por día ofrece la cifra de 5,64.

De cara a complejizar el anterior cálculo en la *Tabla 171* –todo ello a partir de los datos procedentes de la *Tabla 170*– se han introducido dos variables: primero, los promedios anuales de trabajadores por huelga –lo que se denomina en la tabla como *magnitud*–; b) y segundo, la duración media de cada huelga medida por días. En estos campos, y en adelante, tan sólo contamos con los registros de las encuestas del Ministerio de Trabajo. Dejando aparte el primer ciclo considerado, y remitiéndonos ahora exclusivamente para el periodo socialista, tanto para la primera legislatura como para el resto de los años socialistas, de nuevo, el año 1984 destaca por el alto número de trabajadores implicados –1.496,7–. Para clarificar tal panorama se ha vuelto a eliminar el efecto de las huelgas generales tanto de los años ochenta y noventa. La conclusión vuelve a ser evidente: tan sólo durante 1988 habría un mayor promedio de trabajadores por huelga –1.588,9– pero aún así 1984 está por encima del promedio de los dos sub-periodos aquí considerados, tal y como se refleja en la citada *Tabla*. Así por ejemplo para 1983 a 1986 nos ofrece una magnitud promedio de 1.210,4 y para el siguiente sub-periodo sin el efecto de las huelgas generales, 1.114,3. Cuando también se procede aquí a eliminar, de nuevo, los efectos de las huelgas generales para los veinte años considerados la cifra de 1984 sigue siendo superior –1.370,5 entre 1976 a 1996–. Se repiten así las tres señas identificativas hasta ahora relevadas. La amplitud de la conflictividad durante los años inmediatos tras el

fallecimiento al dictador; en segundo lugar, el descenso continuado tanto en magnitud como en días, aunque en relación a esta última variable el cambio no es tan abrupto; y, por último, las significativas cifras en conjunto que ofrece promediar y comparar 1984 con el resto de los periodos.

Obtenida tal radiografía global, resulta también de extraordinario interés detenernos en la actividad huelguística medida por participantes (miles) por sector productivo y huelgas generales. Aquí las propias cifras procedentes tanto del *Boletín de Estadísticas Laborales* y *Anuario de Estadísticas Laborales* difieren muy considerablemente en no pocas ocasiones. En la *Tabla 172* se ha seguido, al igual que en la *Tabla 166*, las revisiones de Jordi Maluquer y Montserrat Lluch en su fundamental contribución en la obra de referencia *Estadísticas históricas de España*. Cifras estas que se han tomado, finalmente, por validas⁸⁹. Pese a todas las revisiones y contrastaciones posibles y más allá de la considerable distancia entre el número de participantes en una y otra tabla, aún se pueden dar por las cifras más fiables.

Dicho esto, en la *Tabla 169* vienen a reproducirse tres grandes características destacadas por la mayoría de los especialistas en este terreno: a) el lento declinar del clásico conflicto industrial, en donde a pesar de progresivo descenso durante los ejecutivos socialistas seguirá conservando una importante capacidad movilizadora. Un hecho, que sin duda, revela la fuerte implantación de los sindicatos de clase en este mismo sector, a pesar del impacto del proceso de reconversión industrial⁹⁰; b) En el sector de la construcción ocurre un proceso similar al de industria, y se caracterizará por no pocos picos huelguísticos durante estos tres lustros; c) Finalmente, el conflicto laboral se traslada de forma mayoritaria al sector servicios, aunque nunca de forma tan intensa como por la que atravesaría la industria o la propia construcción durante la primera mitad del siglo XX. Un hecho que tiene su correspondencia explicativa con el cambio del modelo productivo.

A pesar de que carecemos de no pocas variables para la primera legislatura socialista por las deficiencias ya apuntadas a nivel metodológico; por el contrario, a partir de 1986 se cuentan con sobradas evidencias a nivel estadístico. Aunque estas últimas cifras procedentes de la EHPC tan sólo nos permiten recorrer los años que van de 1986 a 1996, las mismos nos permiten comprobar la evolución de no pocas tendencias apuntadas, muchas de las cuales arrancan en los años previos. Así en la *Tabla 174* se han disgregado un conjunto de datos por sectores –industria, construcción y servicios– en relación al porcentaje de huelgas y huelguistas totales, junto con al porcentaje de jornadas no trabajadas. Añadiéndose, de la misma forma, dos últimas variables: la magnitud y la duración. En este nuevo acercamiento a la realidad laboral, nos posibilita, en primer instancia, matizar algunas tendencias generalistas o ideas-comunes. A pesar del declive del conflicto industrial –clásico– en porcentaje de huelgas durante todo este periodo aquí computado, siempre estará por encima del 50%. De este modo, el descenso más acusado dentro de este sector sería en el total de participantes en huelgas en industria –como vimos en la *Tabla 172* y se visualiza en el *Gráfico 44* elaborado para tal fin– antes que en términos estrictamente porcentuales, al disminuir globalmente la participación de los trabajadores en huelgas. Así pues, y a pesar del cambio del modelo productivo y del propio desmantelamiento progresivo del sector público empresarial empezando por el INI, el promedio porcentual de huelguistas seguiría siendo más elevado durante esta década en el sector industrial –33,54%– que en el de servicios –27,90%–. Pero puestos a matizar, lo que nos revela también la mencionada *Tabla* es que pese a este tipo de tendencias, con todo la industria

⁸⁹ MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de...*, *op.cit.*.

⁹⁰ En este sentido, junto con la obra tantas veces citada de, MARÍN ARCE, José M^a, *Los sindicatos y...*, *op.cit.*, y la bibliografía apuntada en la amplia Capítulo 7, *nota 27*, véase el trabajo de, BENEYTO, Pere, “La afiliación sindical en España: viejos tópicos y nuevas realidades” en id. (ed.), *Afiliación sindical en Europa: modelos y estrategias*, II vols., Valencia, Germania, 2004, vol. I, pp. 21-65. Sumado también a lo apuntado al respecto por, GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales...”, *op.cit.*.

seguirá también siendo el sector más conflictivo en porcentaje de jornadas no trabajadas. Un promedio del 36,01% frente al 31,21% del sector servicios o el 11,17% de la construcción.

Entonces, ¿qué sucede con la tercera tendencia apuntada? Pues sencillamente, que el proceso de cambio en términos de la tipología y la forma del conflicto laboral—con o sin ciclo conflicto— es más lento y menos perceptible de lo que en un principio cabría pensar, si pretendemos leer, a simple vista, las tendencias generales que se apuntan en la *Tabla* al respecto. Con todo, lo que sucederá, en gran medida, en el sector servicios será la aparición de nuevas vías de conflicto en una diversificación paulatina de las estrategias de presión por parte de los asalariados en un mercado cada vez más segmentado, y en un sector con las mayores tasas de temporalidad y a su vez menores tasas de afiliación sindical⁹¹. Las nuevas estrategias de lucha que comienzan a surgir en estos años pero que se consolidan tiempo después, va mucho más allá de los conocidos cauces de lucha implantados durante los setenta y los ochenta. Formas de presión, de resistencia, en suma de nuevos tipos de conflictividad laboral, que tienden a superar, tanto en el terreno formal como tanto en el terreno práctico, el enunciado problemático de la legalidad o ilegalidad, y que, al mismo tiempo, vienen a internarse por canales en no pocos casos no visibles y fuera de los mecanismos institucionales de conciliación, así como por otras vías de negociación fuera de los cauces sindicales tradicionales. O dicho con otras palabras, presentan, en suma, una tipología conflicto totalmente diferente y cuya cuantificación y por consiguiente ordenación estadística, resulta tanto o más difícil. Así pues, estamos en un terreno en donde los estudios sociológicos del conflicto tan sólo están dando sus primeros pasos, aunque cada vez se cuenta con una creciente bibliografía, de gran calidad e interés por otra parte⁹².

Realizadas las anteriores disquisiciones —en ningún caso menores— lo característico de esta década, que coincide con el cambio del modelo productivo, sería el progresivo desplazamiento del conflicto laboral al sector servicios. Si en porcentaje de huelgas y de huelguistas se encuentra por debajo de industria, excepto en determinados picos; sin embargo en magnitud ya supera durante este tiempo al conflicto fabril. Otra característica del conflicto en el sector servicios será su corta duración: 1,20 días por conflicto, frente a los 2,51 de la industria o los 4 días por conflicto en el sector de construcción. Un sector éste último, siempre sometido a una fuerte precarización de sus relaciones laborales y unas altas de mortalidad laboral⁹³.

Junto con todo lo apuntado hasta el momento, nos interesa destacar una cuarta gran característica que, a su manera, es una de las metáforas del lento declinar del conflicto laboral clásico: la desaparición de las huelgas generales —estatales, regionales/comarcales, sectoriales...—. Una metáfora que tiene otro componente íntimamente ligado: la cada vez menos

⁹¹ Nos remitimos aquí al Cuadro “15.2. Afiliación sindical en España, 1977-1994” procedente de, MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de...*, op.cit., a partir, a su vez, de las cifras dadas en su momento por, JORDANA, Jacint, “Reconsidering union membership in Spain, 1977-1994: halting decline in a context of democrating consolidation”, *Industrial Relations Journal*, vol. XXVII, nº 3, (1996), pp. 211-224.

⁹² Véase, en primer lugar, las aportaciones contenidas en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “El Movimiento Obrero en la España del tiempo vivido: del *sujeto político* al nuevo «precariado»” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y id. (coord.), *Manuel Tuñón de Lara...*, op.cit., así como la bibliografía apuntada en su momento en el apartado “2.2.6. De la sociología del cambio y de la exclusión social a la sociología del conflicto: visiones interdisciplinares”, y en concreto, la *nota 123*.

⁹³ Al respecto de esta última cuestión hemos incluido también el anexo la *Tabla 177* titulada: “Número de huelgas según la forma de finalización, 1986-1996”. Aunque no disponemos para este tiempo de datos por sectores y formas de finalización de las huelgas, dicha tabla si ayuda a apuntar algunas tendencias claras, en donde destaca por su importancia el apartado “Plazo Fijado”. Véase, en este sentido, el conocido y citado trabajo de, MARCO ALEDO, Mariluz y TAMBORERO SANJUÁN, Pilar, “Las formas de finalización de las huelgas: análisis de la intervención de terceros en el conflicto en España, 1986-1999”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 31, (2001), pp. 115-134.

“huelgas de solidaridad”. Una vía de movilización que en las décadas anteriores había constituido una de las principales modalidades de conflicto, e inclusive unas de los instrumentos de movilización más fructíferos en lo que se refiere a la conquista de derechos laborales y económicos, a la par que también sería una de las herramientas más eficaces empleadas por el entonces denominado como el *sindicalismo de nuevo cuño*⁹⁴.

Si retrocedemos y observamos, de nuevo, la *Tabla 172*, y más concretamente el apartado “Huelgas Generales”, y eliminamos por enésima vez el efecto de las huelgas de las cuatro huelgas generales de este periodo, resulta evidente la hipótesis descrita. Igualmente, sin salirnos de estos datos, una vez más 1984 se nos aparece como el gran año de la conflictividad tanto en industria como en construcción, aunque no así en servicios siendo superado el dato de 435.000 participantes de 1984 por los del año 1983 sin ir más allá o directamente los 807.900 para la primera legislatura socialista. Pero todavía hay un dato que no se puede dejar escapar de esa misma tabla: la participación de 850.000 personas a lo largo de 1984 en huelgas generales no estatales. El dato más alto de toda la época socialista sin el tan mencionado efecto de las huelgas generales a nivel estatal.

A partir de este mismo cuadro hemos construido, a su vez, una serie de tablas. En primer lugar, la *Tabla 173*, presenta la participación total y en huelgas generales comparado con el total de población activa –siempre contabiliza con los datos proporcionados por la EPA en el IV Trimestre de cada año– dividida a su vez en dos categorías fundamentales: ocupados y parados. Es decir, se ha procedido a realizar una aproximación de la participación de la población trabajadora en la conflictividad laboral, a partir de la hipótesis estadística de que es la población activa –ocupada o parada– la que participa de forma mayoritaria en las propias huelgas. Aunque no pocos matices podrían señalarse una vez que se conocen los datos y sobre todo en las dificultades de contabilizar a ciencia exacta el número de participantes; creemos que los datos obtenidos son altamente significativos tanto de la importancia del año 1984 como del progresivo declive de la conflictividad laboral. Para clarificar todo lo anterior, se presenta, primero, el *Gráfico 45* en donde se ha tomado por variable fundamental la participación de los trabajadores en huelgas generales –estatales o no– para los catorce años socialistas. Más allá de las barras correspondientes a los años 1988, 1992 y 1994 y en menor medida de 1985 –a pesar de que la huelga general de junio de aquel año sería leída en términos de éxito por los sindicatos convocantes, y, en donde la base de datos del MTAS plantea la participación de poco más de un millón de personas en huelgas durante todo aquel año– sorprende datos tan bajos como los de 1982 o 1986 pero muy especialmente los de 1989, 1990 o 1995 o 1996. Datos, a partir de los cuales, se ha de suponer que, prácticamente, unos pocos miles de personas habrían participado en el huelgas generales que tienden a identificarse con las de “solidaridad”. Unos mismos datos saltados en el tiempo y tan bajos, que cuando menos deberían abrir una reflexión sobre la exactitud de las cifras así como la metodología seguida en tal campo. Lo que no evita, en cualquier caso, mostrar el progresivo descenso del “factor de la solidaridad” como causa de la movilización laboral.

Con el objetivo de verificar la cuestión también antes destacada, a saber, la progresiva disminución tanto de la conflictividad medida en número de huelgas como en número de participantes, hemos construido a partir de las anteriores evidencias estadísticas, la evolución de la población activa en conflictos laborales medida en porcentaje. Los resultados del *Gráfico 43* no pueden ser más notorios. Si para los dos primeros años de gobierno socialista –1983 y 1984– más de un 25% de la población activa participarían en algún una huelga laboral –y de hecho, 1984 con su 30,23% representa, una vez más, la cifra más sin el efecto de las huelgas generales–; lo que sigue a continuación es un descenso progresivo cuando no abrupto de la participación de los trabajadores. Si hasta la huelga general de 1988 –con una brutal participación del 44,18% en algún conflicto laboral, es decir, prácticamente la mitad de la población asalariada– la cifras se mantienen superiores al 10% a excepción de 1986 –que con

⁹⁴ SARTORIUS, Nicolás, *El sindicalismo de..., op.cit.*. Véase también el interesante relato de, id. y ALFAYA, Javier, *La memoria insumida: sobre la Dictadura de Franco*, Madrid, Espasa, 1999.

un 5,99% se revela como un año de transición entre el segundo al tercer ciclo de conflictividad descritos; a partir de 1989, y a pesar de la excepción del rebrote conflictivo de 1991 –con un 12,41%– y de las huelgas generales de 1992 y 1994, en ningún caso se superaría el 10% de participación. De hecho, los datos para 1995, con tan sólo un 3,49% apoyarían de forma rotunda las tendencias apuntadas. Así pues, lo que nos aporta la citada tabla es, en suma, un brutal descenso de la población asalariada que participaría en conflictos laborales durante todos este tiempo.

Esta desaparición progresiva de la *solidaridad como el motor de la movilización laboral*, mucho tiene que ver a su vez con el cambio en la tipología y en las causas de las huelgas. En la *Tabla 174* se presenta una visión básica de los motivos principales de la conflictividad en España entre 1986 a 1996⁹⁵. Si algo viene a señalar los datos es, sencillamente, que el principal motivo de convocatoria de huelgas durante todo este tiempo es lo que clasifica como “No negociación colectiva”. Término vinculado a una multitud de factores (regulaciones de empleo, impago de salarios, mejoras colectivas, tiempo de trabajo...) que, en suma, se relacionarían con el conflicto laboral no estrictamente salarial. Siempre por encima del 50%, en un promedio del 60,41% muy superior al 33,65% del promedio de la variable “Negociación colectiva”⁹⁶. No obstante, este tipo de conflictividad se caracterizaría, al mismo tiempo, por una magnitud baja y una duración media –2,63 días por 3 días en relación a la negociación colectiva⁹⁷–. Para saber algo más de esta metamorfosis de la casuística de la conflictividad en la *Tabla 176* se detallan hasta seis motivos de convocatoria de las huelgas –*Presión para iniciar negociación, Presión durante negociación, Organización del Trabajo, Impago de salarios, Solidaridad, Anuncio medidas político-económicas*– según su magnitud y duración. Dejando de lado momentáneamente las dos últimas variables, la causa que más trabajadores mueves en términos de magnitud es “Presión durante la negociación”, con un promedio durante la década comprendida entre 1986 a 1996 de 1500,35 frente a las 1267,92 de la presión para iniciar negociación, las 470,6 en relación a la organización del trabajo o las 74,96 a la hora de la cuestión del impago de los salarios. De esta forma, los mayores picos de esta misma variable coinciden con los años sin acuerdos interconfederales o de otro tipo, al igual que sucede con la presión de cara a iniciar una negociación. Por otro lado, mientras que la causa “organización del trabajo” no responde a un patrón definido vinculándose mayoritariamente a casos concretos, destaca la causa del “impago de salarios” con notables oscilaciones como ocurriría durante la fase de auge económico –por ejemplo en 1988 o 1990– Todo ello con otra seña de identidad: su larga duración que en promedio de 5,73 días. Una cifra considerable frente a los 3,39 en relación a la organización del trabajo o los 3,17 del apartado presión para iniciar una negociación.

Tanto la *Tabla 175* como en la *Tabla 176* nos ayudan a reconfirmar, nuevamente, la tesis del descenso del “factor solidaridad”. Si atendemos a la *Tabla 175* observamos como las *huelgas no laborales*, como una de las expresiones generalmente más vinculadas con el “factor

⁹⁵ Una vez más para fechas anteriores no disponemos de datos al respecto, por los cambios metodológicos que el Ministro de Trabajo introduce a partir de 1986 y que ya han sido comentado en más de una ocasión.

⁹⁶ En este sentido, véanse las tesis defendidas por, LABEAGA AZCONA, José M^a, MARCO ALEDO, Mariluz y JIMÉNEZ MARTÍN, Sergi, “Algunos factores explicativos de la existencia de huelgas durante la negociación colectiva”, *Investigaciones Económicas*, vol. XX, n° 2, (1996), pp. 217-242.

⁹⁷ Al respecto resulta enormemente interesante acercarse al trabajo, JODAR, Pere, “Conflictividad y huelgas generales en España (1993-2004)”, *Ius labor*, n° 1, (2006), en donde se recorrerían con sumo detalle este mismo tiempo. Concluyendo: «La conflictividad laboral en España, aún manteniéndose comparativamente más alta que la de otros países europeos y de la OCDE, sigue pautas similares a la de los países desarrollados y tiende al descenso, incluso en períodos de auge económico, en los que tradicionalmente los trabajadores y sus sindicatos intentar recuperar la capacidad adquisitiva». Igualmente véase, ROYO, Sebastián, “Beyond Confrontation. The resurgence of social bargaining in Spain in the 1990s”, *Comparative Political Studies*, vol. XXXIX, n° 8, (2006), pp. 969-995.

solidaridad”, constituyeron –casi por regla general– una variable siempre menor. En porcentaje se mueve en estos años de media entre el 5% al 6,5%. De muy corta duración –1,11 días de media– no obstante, siempre han registro las mayores magnitudes, tanto en años con huelgas generales como sin ellas –con un promedio de 24234,36 frente a los 1402,67 de las movilizaciones por negociación colectiva o los 704,09 de los otros conflictos no motivados por negociación colectiva–. A la hora de delimitar el devenir de la conflictividad laboral por solidaridad, los datos de la *Tabla 176* si nos permite internarnos directamente por las huelgas clasificadas directamente como por “solidaridad”. En este caso, contamos con las variables de magnitud y duración. Por *magnitud* las huelgas por solidaridad, junto con las clasificadas como “anuncio de medidas política económica”, generalmente son las que mayor número de personas han movido. Promediadas entre 1986 y 1996, la magnitud de las de solidaridad estarían en 1887,4, mientras que las motivadas antes los anuncios de medidas económicas estarían en 78318,16. En ambos casos, su duración sería extremadamente corta: 1,32 y 1,23 días respectivamente, lo que también muestra los objetivos de tales movilizaciones. A ello debe apuntarse lo siguiente: al igual que antes se han incluido las huelgas no laborables en el siempre no claro apartado de la solidaridad, en este caso, y sobre todo cuando se tienen en cuenta los datos de los años 1988, 1992 y 1994 en su contexto específico, tampoco sería descartable, en los términos que nos movemos, incluir el “factor solidaridad” dentro del campo aquí ahora citado.

Quedan por abordar dos cuestiones. La primera guarda relación con la perspectiva geográfica. A nivel nacional se presenta en la *Tabla 178* un *mapa huelguístico cuantitativo* del país. El resultado no por esperado no deja de ser obvio: a un mayor nivel económico e industrial un mayor nivel de conflictividad. Aunque el citado mapa no recoge los años de mayor impacto de la reconversión industrial (1983-1985) –y ahí regiones como Asturias, Galicia o Cantabria, a buen seguro, tendrían un porcentaje más alto de la media nacional– si permite visualizar sin problemas la hipótesis de partida. Resulta así que tanto Cataluña como Madrid se encuentran con un promedio del 11% a la cabeza, junto con Galicia y Asturias con igual porcentaje promediado. Caso aparte sería el País Vasco para el cual tan sólo disponemos de datos para entre 1990 a 1996 con un promedio del 14,9%. Un porcentaje prácticamente similar al de Andalucía –14,74%– aunque aquí ha de tenerse presente una doble conflictividad: la procedente de las grandes empresas públicas vinculadas al INI –principalmente los astilleros de Cádiz y de Huelva⁹⁸– junto con el tradicional problema del campo que se arrastra vivamente todavía en estas fechas. Y de este mismo *mapa* se puede extraer otra gran conclusión: la tradicional debilidad del movimiento obrero en las dos Castillas –en todo caso, en Castilla y León con un promedio porcentual del 7,5% se sitúa a un nivel medio-bajo aunque cabría distinguir más específicamente por regiones– en Extremadura o en otras regiones como Murcia o la Rioja, en donde la conflictividad laboral es prácticamente inexistente a tenor de los datos expuestos. Caso especial, a pesar de la existencia de un movimiento obrero –tanto de *clase* como *nacional*– y de un fuerte desarrollo económico sería el caso de Navarra con un promedio del 2,09%.

De cara a cerrar este sintético repaso por la conflictividad laboral durante los gobiernos socialistas, con especial atención a la primera legislatura y a lo que aconteció en 1984, nos hemos preguntado si a nivel internacional aquel mismo año destacó en su entorno europeo. En el *Gráfico 36* se presenta la evolución de la conflictividad laboral medida en número de huelgas entre 1980 a 1986 tanto en España como en Francia, Grecia, Italia, Portugal y en el Reino Unido. A poco que se indague resulta que durante 1984, y como es habitual en los dos años previos –no ocurriría así durante 1980 y 1981 cuando las huelgas en España estaban al nivel de Francia e inclusive de Italia– la conflictividad en España se situó en un nivel medio superada por los dos países europeos más conflictivos –Francia e Italia– así como en Reino Unido en un año marcado por la huelga de los mineros.

⁹⁸ Véase aquí lo apuntado en el Capítulo 2, *nota* 526.

A excepción de este último caso, el interés del gráfico se encuentra también en que todos y cada uno de los países seleccionados gobernaban los socialistas –en Francia, Mitterrand, en Grecia, Andreas Papandreu, en Italia, Bettino Craxi y en Portugal Mario Soares⁹⁹–. Como pueden observarse en el citado gráfico los casos de Grecia y Portugal se situarían en un nivel medio-bajo, tanto en el arco mediterráneo como a nivel de la UE-15. Asimismo, en el *Gráfico 37*, *Gráfico 38* y *Gráfico 39* se ha detallado con mayor precisión lo ocurrido en 1984. Aunque las tendencias generales no se modifican, el *Gráfico 37* nos permite observar, en todo caso, como España se situaba al doble de la media europea –UE-15– en número de huelgas –1498 frente a 793,84– aunque a mas de mil huelgas que en Francia (2537). En el *Gráfico 38* se ha realizado la misma operación pero *jugando* con la variable de los trabajadores implicados, según datos de la OIT. Aquí, lógicamente, no sólo entra en juego el contexto histórico y político de cada país o el desarrollo de los sindicatos de clase, sino la demografía pura y dura. No obstante, este mismo gráfico releva la no correlación automática entre el número de huelgas y el total de trabajadores implicados en la misma. El caso de Italia con 7.356.525 trabajadores implicados releva un alto nivel de conflictividad en un país con una fuerte movimiento obrero y sometido, año tras año, a numerosas huelgas generales. Pero en este mismo esquema estadístico España ocupa una destacada posición – segunda con 2.242.200 frente a 908.041 de la media UE-15 o superior a los 791.300 de Reino Unido– sin que por medio, recordemos, hubiera ninguna huelga general. Todo lo cual viene a resaltar, una vez más, lo específico del aquel citado año en materia de conflictos inclusive a nivel internacional. Otro tanto ocurre cuando nos aproximamos al *Gráfico 39* que visualiza los días no trabajados. En este caso, Reino Unido encabeza de forma sobresaliente la estadística –271.350.000 días no trabajados– muy por encima de países como Italia o la República Federal Alemana –8.703.286 y 5.617.595, respectivamente– o como en España –6.357.800–. Precisamente es relación a estos dos últimos países donde debería partir una posible comparación para certificar, una vez más, el nivel medio-alto de la conflictiva española en su entorno internacional durante 1984.

11.2.2. Reconstruyendo las lógicas de la conflictividad social-obrera en la España de los ochenta

Pasar de los datos a lo tangible, a la realidad social, a historiar, en suma, desde *abajo* y *con los de abajo*, este periodo conflictivo se presenta como una tarea para nada sencilla. Aunque no se pretende aquí entrar en los pequeños detalles de cada conflicto, de cada huelga, de cada manifestación, de cada protesta laboral; lo que sí se busca es ofrecer un ángulo de visión cuando menos diferente de lo ahora dicho. Así pues, nos detendremos, principalmente, en los tres primeros meses del mil novecientos ochenta y cuatro.

Nos encontramos aquí ante una de las grandes asignaturas de la historia social, en mayúsculas. Todo ello una vez que se observa lo publicado o sin ir más lejos las propias *ideas-fuerzas* en torno a este periodo histórico tan concreto. En gran medida, estamos ante otro de esos capítulos de la memoria social democrática extraviada. *Extraviada*, en gran medida, por la extendida “cultura de la derrota” de la que antes habláramos. Cierta o no esta hipótesis, insistimos, se trata de uno de los capítulos más extraordinarios en la historia del movimiento obrero español, por más que sobre mismo haya pasado discretamente por encima a la hora de hacer su propio balance¹⁰⁰.

En esta historia social por construir, todavía hoy se han de partir, en un primer lugar, de las crónicas laborales de los periódicos de mayor tirada del país. En este caso, una vez más, se

⁹⁹ En este sentido, vuelve a resultar clave repasar el libro de, PETRAS, James, *La socialdemocracia del...*, *op.cit.*.

¹⁰⁰ Nos remitimos a lo señalado en su momento en el apartado “3.2. Un balance revisitado: ¿una agenda investigadora *inconclusa*?”, y en concreto a los planteos propuestos por, TÉBAR, Javier, “La clase trabajadora en la «Gran Barcelona», 1951-1988. Reflexiones para el debate» en *id.*, (ed.), *El movimiento obrero...*, *op.cit.*.

han empleado las proporcionadas por *El País* así como las del *ABC*. Como ya se advirtió previamente¹⁰¹, durante los años ochenta una parte no menor de lo que hoy es exclusivamente la sección de Economía de los periódicos, lo constituía la entonces denominada Sección de Economía, Trabajo y Sociedad con un apartado generalmente dedicado a la conflictividad laboral. Igualmente, ha de partirse del hecho de que ambos medios tan sólo recogerían una pequeña muestra de la realidad conflictiva, tanto por espacio físico como por la línea político-editorial al respecto. Cualquier investigador que quiera internarse plenamente en ese periodo, a buen seguro, tendría que recorrer un mayor número de periódicos –empezando por *Diario 16*– o sin ir más lejos por algunas de las publicaciones periódicas de las organizaciones políticas y sindicales “obreras”. En nuestro caso, se ha recurrido a *El Socialista*, a *Unión y Gaceta Sindical*.

De lo que estamos prácticamente seguros es que el rastro documental de no pocos conflictos de este tiempo se ha perdido, bien por la ausencia de cobertura mediática, bien por la pérdida de la documentación generada en su caso. Y con todo, cuando se revisan las crónicas laborales de *El País* y el *ABC* para este primer trimestre, lo que se nos aparece es una narración vibrante, en donde prácticamente no hay día sin una huelga o conflicto laboral. Además con una energía e intensidad que a la par que ayuda a construir una fotografía global generalista, ayuda a transformar la frialdad de los datos en pequeñas o grandes historias, que nos hablan, en suma, de un tiempo en que la estabilidad del orden público, social y económico era un bien escaso.

Desde que en la temprana fecha del 18 de marzo de 1983, en la práctica, se movilizara todo el pueblo de Sagunto en defensa de su industria siderúrgica, aun cuando todavía ni siquiera el Gobierno socialista había comenzado su política de reconversión en términos propiamente dichos: aquel pueblo valenciano se convertiría en el símbolo de la lucha obrera por excelencia de la primera legislatura socialista¹⁰². Ello a pesar de no faltar conflictos como los de Aceriales, Hunosa¹⁰³ o Euskalduna¹⁰⁴ y otros tantos impregnados de la estética obrerista tan propia de un viejo más que nuevo ya entonces movimiento obrero.

Sagunto, decíamos, se transformaría en el icono de este intenso ciclo conflictivo, que tiene su periodo de mayor auge nueve meses después. Es así ya que la defensa de la producción de los Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) viene a concentrar no pocas de las características de este periodo de huelgas. Encontramos en tal conflicto seis rasgos que se observan –junto o por separados– en la mayoría de los conflictos de 1984: a) el estallido de un conflicto obrero industrial que rápidamente conecta con un *malestar social* derivado de la duración y costes de una larga crisis económica, hasta confluir en un estallido generalizado a nivel local. Un estallido que pone en cuestión cuando no lo desborda directamente el orden público y/o público establecido; b) La intensidad y duración de estos conflictos no puede entenderse si no se aplica una óptica local, pues es este ámbito en donde transcurre la mayoría de los conflictos de los que nos ocuparemos. De hecho, pocos de ellos darán el salto a un nivel geográfico mayor. Todo lo cual imprime a estos movimientos, por un lado, una considerable fortaleza al basar su

¹⁰¹ Véase lo señalado en el apartado “2.3.1.2. Fuentes secundarias”.

¹⁰² Junto a la citada obra de, SÁEZ GARCÍA, Miguel Ángel y DÍAZ MORLÁN, Pablo, *El puerto del...*, *op.cit.*, véase la bibliografía apuntada en el Capítulo 3, *nota 165*, *nota 168* o *nota 172*, entre otras.

¹⁰³ Nos remitimos aquí al excepcional trabajo de, GARCÍA PIÑEIRO, Ramón, “El declive de HUNOSA. Resistencia obrera y sindical al ocaso de la minería pública” en ARENAS POSADAS, Carlos, PONS PONS, Jerònia y FLORENCIO PUNTAS, Antonio (eds.), *Trabajo y relaciones...*, *op.cit.*, pp. 405-418. Del mismo autor consúltese también, id., “¿El ocaso de un mito? Movilizaciones y radicalismo minero durante la transición (1977-1982)”, *Sociología del Trabajo*, nº 30, (1997), pp. 123-148. Todo ello junto con lo apuntado en el *Capítulo 7*, *nota 27*, en donde se aportó en su momento una abundante bibliografía sobre la reconversión industrial y un posible mapa de la conflictividad *ad hoc*.

¹⁰⁴ Un libro imprescindible al respecto es: COLECTIVO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES DE EUSKALDUNA, *La batalla de Euskalduna: ejemplo de resistencia obrera*, Madrid, Revolución, 1985.

capacidad de presión en la “fuerza de la solidaridad” de clase, local, vecinal; pero, por otro lado, esta misma dimensión local será también causa de su principal debilidad al poder ser aislado del resto de conflictos; c) en tercer lugar, nos encontramos, y aquí Sagunto es un ejemplo muy significativo, de conflictos a la defensiva con el objeto de evitar el cierre de las grandes empresas públicas –en su mayoría– que llevarían a la desertización industrial de regiones enteras; d) en cuarto término, se observan una enorme tipología de vías de presión, movilización y conflicto, en donde la violencia física constituye un componente central en no pocos casos. El repertorio de acción colectiva recoge, en suma, múltiples experiencias del movimiento autónomo de los años setenta. En gran medida, se recupera, además, el carácter asambleario, horizontal y de clase que caracterizó en su momento el origen de las Comisiones Obreras bajo el franquismo; e) en quinto lugar, este tipo de conflictos obreros desbordarán los cauces institucionales o oficiales establecidos para la resolución habitual de las huelgas, todo ello con la “consiguiente intranquilidad por la posible pérdida de bases de los sindicatos mayoritarios, máxime en un proceso tan abierto, extenso y dilatado en el tiempo como en de la reconversión”¹⁰⁵. Primero, ante la incapacidad por controlar los grandes sindicatos a sus propios militantes o simplemente al verse desbordados por sus estructuras a nivel local. Segundo, en no pocas ocasiones, el poder político será barrido temporalmente al verse superado por la intensidad de los propios conflictos obreros. Todo lo cual llevará, a su vez, a la intensificación de múltiples formas de represión contra el movimiento obrero, dejando en un margen secundario las vías de negociación: f) a la hora de los resultados finales, lo que nos encontramos, de forma habitual, es con derrotas transformadas en victorias parciales aunque reversibles en el tiempo. Aquí las causas serán múltiples: desde la fragmentación localista de los conflictos, a la división y enfrentamiento entre los grandes sindicatos de clase o la propia posición inamovible del Gobierno y más concretamente del Ministro de Economía.

Otra característica central de todo este periodo será la extensión de una alarma social generalizada. El papel de los medios de comunicación sería clave. Desde que estallara el conflicto de Sagunto en el primer semestre de 1983 hasta su parcial resolución, prácticamente, un año después –en abril de 1984– la imagen fuerza de aquel conflicto, sumado a otros tantos, transmitirían una imagen de crisis social generalizada. En una pausa de aquel conflicto en septiembre de 1983 –cuando el conflicto había ya deparado no pocos episodios de violencia y de desbordamiento del orden político establecido– el propio *El País* publicaba un amplio reportaje firmado por Manuel Muñoz en el que se esbozaba el siguiente cuadro general, en donde, a grandes rasgos, se recogían las características antes señaladas:

«La lucha de los trabajadores de AHM se ha caracterizado, con la única excepción de agosto, por una presión constante y simultánea ejercida por medios diferentes. Han realizado 10 huelgas generales, varias manifestaciones en Madrid, en Valencia y en Sagunto (estas últimas multitudinarias), cortes de carreteras y repetidos actos de desobediencia de la dirección, antes lo que está ha terminado optando por ceder [...] Sin olvidar la recogida de firmas para intentar derogar el decreto de inversiones en la siderurgia. Junto a todo ello, el conflicto ha estado salpicado de incidentes, como las agresiones al presidente de la Generalitat valenciana, Joan Llerma, en la pasada campaña electoral, cuando intentaba dar un mitin en Puerto de Sagunto; o el secuestro multitudinario con amenazas de linchamiento, del presidente de AHM y Ensidesa, José María Lucía, en la única ocasión que acudió a la factoría desde que fue nombrado»¹⁰⁶.

Pero la experiencia de lucha de Sagunto iría mucho más allá. De ello daba cuenta el citado reportaje, en donde narraba cómo había transcurrido la asamblea en la que se tenía que decidir se aceptaba o no una propuesta de acuerdo. Detalles tanto más interesantes en cuanto retrataban no pocas de las señas de identidad de este ciclo conflictivo. Así, por ejemplo, cuando el presidente del Comité de empresa –Miguel Campoy– solicitó en aquella ocasión el voto secreto, “en contra de la costumbre”, también se daba un paso más, pues como recordaba el periodista: “Era la primera vez que no votaban todos los presentes –parece que Campoy temió

¹⁰⁵ OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 185.

¹⁰⁶ Reportaje, Manuel Muñoz, “Sagunto, un respiro tras ocho meses de conflicto”, *El País*, 25 de septiembre de 1983.

el posible voto más radical de las mujeres—”. He aquí un interesante apunte sobre las *desviaciones radicales* que se producirían en torno a este conflicto local. Pero como también hemos mencionado, más allá de la violencia que acompañaría a este conflicto, el riesgo de que las centrales sindicales mayoritarias –CCOO y UGT en este caso– se vieran desbordadas había quedado patente: “Al final y al cabo, lo que se planteó el pasado jueves fue una tensión que no es nueva entre la dirección de los trabajadores [...] y la posibilidades que la inercia desborde una lucha que está planteada por los sindicatos, con sus treguas y oportunidades de negociación”. También desbordada se vería la dirección del INI, pues como señalaba la noticia, el poder de parar o no la producción había quedado en manos de la asamblea –“deciden los saguntinos en asamblea y [...] el comité de empresa”–. Como concluía el reportaje: “Por ello se ha hablado de una *sovietización* en la empresa”¹⁰⁷.

Evidentemente no todos los conflictos de aquel tiempo iban a tener tal intensidad ni seguiría de forma mimética todas y cada de una de las pautas aquí apuntadas. Y, claro está, tan poco conseguirían acuerdos tan “favorables” –leídos en aquel contexto y en aquellas condiciones– gracias a la incansable presión de los trabajadores.

Característico también de este tiempo –como anunciábamos– sería la preocupación que desde instancias oficiales y en medios de comunicación se transmitiría. Por ejemplo, *El País* iba editorializar sobre aquel conflicto en numerosas ocasiones a lo largo de 1983: “Violencia en Sagunto”¹⁰⁸, “Sagunto y la reconversión siderúrgica”¹⁰⁹, “El conflicto de Sagunto”¹¹⁰. Tres serían las grandes claves interpretativas en torno a aquel conflicto y, en líneas generales, sobre las demás movilizaciones obreras. Primero, el apoyo sin fisuras a la política económica del Gobierno, aunque no así en la forma de llevarla a cabo; segundo, un apoyo a la represión policial o de otro tipo de cara a mantener el orden público. Junto con la deslegitimación o directamente la difamación de los promotores; y en tercer lugar, constantes llamamientos a la paz social mediante un nuevo gran pacto social entre los interlocutores sociales. Así pues, en el primer editorial mencionado –“Violencia en Sagunto”– tras hablar de “graves desórdenes como consecuencia del desbordamiento de que [fue] objeto la coordinadora de las centrales sindicales, cuyas directrices fueron ampliamente rebasadas por un sector de los manifestantes...”; desde las páginas del periódico independiente progresista dejaba entrever su apoyo a la represión policial, a pesar de sus posibles consecuencias en víctimas mortales:

«La formación de barricadas y los atentados contra instalaciones públicas abren desgraciadamente la posibilidad que una intervención desafortunada de los cuerpos de seguridad, realizada en el clima de extrema crispación y tensión reinante, produzca como resultado choques de consecuencias imprevisibles. Confiemos en que los responsables de las fuerzas del orden público no caigan en las trampas que algunos eventuales provocadores puedan tenderseles a fin de reforzar con sangre los llamamientos a la protesta».

Detalles no menores aparte, junto con el achaque de responsabilidades dispares contra las fuerzas sindicales empezando en aquella ocasión por la UGT, el apoyo a la política de reconversión era total: “Dicho sea en su honor [...] Carlos Solchaga y el Gobierno entero están asumiendo los costes de impopularidad, los problemas de conciencia y los riesgos personales que los anteriores gabinetes fueron incapaces de afrontar”¹¹¹.

Cuatro días después, el jueves 7 de julio de 1983 *El País* volvía a editorializar sobre el asunto en un tono más calmado, tras la exitosa manifestación de los trabajadores y buena parte de la población de Sagunto en Madrid el día anterior. Así tras el título, “Sagunto y la

¹⁰⁷ Reportaje, Manuel Muñoz, “Sagunto, un respiro tras ocho meses de conflicto”, *El País*, 25 de septiembre de 1983.

¹⁰⁸ Editorial, “Violencia en Sagunto”, *El País*, 3 de julio de 1983.

¹⁰⁹ Editorial, “Sagunto y la reconversión siderúrgica”, *El País*, 7 de julio de 1983.

¹¹⁰ Editorial, “El conflicto de Sagunto”, *El País*, 20 de septiembre de 1983.

¹¹¹ Editorial, “Violencia en Sagunto”, *El País*, 3 de julio de 1983.

reconversión siderúrgica”, aquel largo editorial más bien parecía un resumen ejecutivo de un documento de trabajo del Ministerio de Economía que un *nota de opinión* propiamente dicha. En cualquier caso, la conclusión siempre sería la misma: “El caso Sagunto es, sencillamente, una medida impopular y dolorosa que el Gobierno de Felipe González no tiene más remedio que adoptar con vistas a la reconversión y puesta en viabilidad del sector siderúrgico, necesitado de una cuidadosa selección de las medidas”¹¹².

Según avanzaba el conflicto de Sagunto más claro quedaba que aquel, sin duda alguna, se estaba convirtiendo en una especie de laboratorio de pruebas –o como lo denominara Rubén Vega en una “experiencia piloto”¹¹³– de la futura reconversión industrial. *Laboratorio*, tanto para la Administración Pública como para el movimiento obrero y los trabajadores industriales en su conjunto. Pasaban los meses y el simbolismo de la resistencia de los Altos Hornos del Mediterráneo no dejaban de crecer. Bajo la gran consigna de defender el empleo y la viabilidad de la siderurgia, todos los esfuerzos se irían concentrando en que la producción no se parara. En esto los trabajadores de AHM se convertirían en unos consumados especialistas. Una *defensa de la producción* que *El País* calificaría como un “desafío al Gobierno”. Bajo el título: “El conflicto de Sagunto” se volvían a repetir todas las consignas consabidas, empezando por la de la “inevitabilidad” de las decisiones en materia económica adoptada. Ahora bien, en aquel editorial se introducía una nueva *idea-fuerza*: la necesidad de que el Gobierno mostrará toda la firmeza, pues en juego estaba su “credibilidad ante los ciudadanos”.

«En Sagunto se juegan muchas más cosas que un tren de laminación o que el futuro empleo de los obreros de la factoría: se juega la credibilidad en la capacidad del gobierno para dar respuesta a la vez a tantas contradicciones juntas. En suma, es la primera prueba seria que este gabinete tiene para demostrar que sabe precisamente gobernar: donde la suma aritmética de votos, la magia del Boletín Oficial, la fuerza de los guardias, la retórica de los discursos y las declaraciones de fe no valen absolutamente para nada si uno no sabe llevar el timón de la nave del Estado»¹¹⁴.

De ahí a la resolución del conflicto de Sagunto pasarían no pocos meses en donde la movilización de los trabajadores ocuparía no pocos minutos informativos, así como no pocas portadas de periódicos. Sagunto como *laboratorio de pruebas* y como cuadro descriptivo característico reflectante de buena parte de los conflictos del primer trimestre de 1984, igualmente evidenció a su conclusión –en abril del ochenta y cuatro, justo cuando el ciclo conflictivo decaía– los muy estrechos límites de “victorias” y “conquistas” en torno a las que se movía el movimiento obrero en aquel entonces. En aquella ocasión de los 1.700 trabajadores considerados como “excedentes”, 1.200 con más de 55 años pasarían a los fondos de empleo y de ahí a la jubilación anticipada. Los otros 500 se les recolocaría en diversas empresas de INI. La parcial *victoria*, precisamente, consistiría en evitar un solo despido. Victoria acompañada de una clara derrota al no evitar el cierre de los AHM. Pero aquel mismo conflicto también tendría importantes consecuencias para el Gobierno. Como recordaba, una vez más, un editorial de *El País* aquella alta conflictividad social había conllevado un “profundo deterioro del propio Gobierno”. Y lo que todavía era más grave: “Durante los últimos 13 meses se ha resentido la autoridad y la credibilidad de un Gobierno que amenaza [...] sin cesar y sin cumplir sus amenazas”¹¹⁵.

Pasados los primeros meses del año ochenta y cuatro, la situación política, económica y social no podía ser más preocupante cuando no alarmante para el Ejecutivo socialista. Las lecciones del *non nato* AI’84 se arremolinaban para los dirigentes del equipo económico del Gobierno, quienes habían rechazado cualquier tipo de acuerdo y/o pacto social que no pasara

¹¹² Editorial, “Sagunto y la reconversión siderúrgica”, *El País*, 7 de julio de 1983.

¹¹³ VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, *op.cit.*, p. 172.

¹¹⁴ Editorial, “El conflicto de Sagunto”, *El País*, 20 de septiembre de 1983.

¹¹⁵ Editorial, “Un acuerdo tardío”, *El País*, 8 de abril de 1984.

por sus rígidas pretensiones macroeconómicas. La fuerza de los hechos, de la realidad cotidiana, se impondría, eso sí, con no pocos límites.

Para empezar con parte del final no pasaría semana desde la ruptura de las reuniones para un acuerdo interconfederal, en que no se conociera la firma de un convenio a nivel de empresa o inclusive de sector que superara la recomendación gubernamental del 6,5%. De hecho, la no existencia de un AI'84 obligaría a negociar –según se recogía en un amplio reportaje de ABC¹¹⁶– en torno a 3.600 convenios colectivos, en donde los escasos tiempos con lo que se contaban todavía iban a reducir más la negociación colectiva a la mera cuestión salarial.

Con una nota añadida que volvía a dejar reflejaba la falta de autoridad del propio Gobierno: la *insumisión directa* en no pocas empresas públicas a la hora de aplicar el alza salarial de lo fijado en los Presupuestos Generales del Estado –también el 6,5%–¹¹⁷. Más allá de la posición de la propia UGT en relación a la empresa pública contraría al posicionamiento del Gobierno¹¹⁸; en aquel mismo año 1984 se conocerían algunos varapalos judiciales contra lo aprobado en la propia Ley 44/1983, de 28 de diciembre, *de Presupuestos Generales del Estado para 1984*. En tanto desde algunas magistraturas de trabajo se daría prioridad a lo pactado en convenio por encima de lo aprobado por el Gobierno inclusive en empresas con pérdidas¹¹⁹.

El balance al final del primer trimestre era claro: las recomendaciones del Gobierno se habían visto superadas ampliamente. Según el análisis que CCOO y UGT ofrecían para finales de marzo de 1984, la subida salarial pactada a nivel de empresa superaba un punto la recomendación gubernamental. Mientras que la UGT la estimaba en el 7,6%, CCOO lo subía al 7,93%¹²⁰. Ya en aquella temprana fecha, el mismo presidente del Gobierno cuya confianza en el equipo dirigido por Miguel Boyer parecía inquebrantable, daba por aprendida la lección¹²¹.

Tras los datos de los sindicatos o de la patronal vendría la confirmación oficial. En mayo de aquel año, Trabajo reconocía un incremento salarial del 7,75%. La muestra ya era

¹¹⁶ Reportaje, Amancio Fernández “Rotas las negociaciones salariales 1984”, *ABC*, 19 de enero de 1984.

¹¹⁷ Ley 44/1983, de 28 de diciembre, *de Presupuestos Generales del Estado para 1984*. Véase aquí también el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”.

¹¹⁸ Véase, Noticia, “UGT se enfrenta al Gobierno rechazando el tope salarial en las empresas públicas”, *El País*, 26 de enero de 1984. Un mes más tarde, CCOO recurría al mismo defensor del pueblo –Joaquín Ruiz-Giménez– para denunciar los topes salariales al considerar que violaban los artículos 14, 28 y 3 de la Constitución e interferir en el derecho de negociación colectiva. Noticia, “CCOO pide al defensor del pueblo que recurra el 6,5% de aumento en el sector público”, *El País*, 24 de febrero de 1984. Y días más tarde también se conocía: Noticia, Rodolfo Serrano, “Sólo una empresa pública ha comenzado a pagar subidas salariales por encima del 6,5%”, *El País*, 5 de marzo de 1984.

¹¹⁹ Este sería el caso de una de las sentencias más difundidas y conocidas en aquellos momentos. Nos referimos a la publicada por la Magistratura de Trabajo de Sevilla en mayo de 1984 en relación al convenio de los trabajadores del hotel Alfonso XXII perteneciente a la antigua Empresa Nacional de Turismo. Véase, Noticia, Rodolfo Serrano, “Las empresas públicas deben aplicar el tope salarial del 6,5%, aunque pactarán más”, *El País*, 14 de mayo de 1984.

¹²⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los aumentos salariales pactados rompen el tipo del 6,5% recomendado por el Gobierno”, *El País*, 8 de marzo de 1984; Noticia, Rodolfo Serrano, “Las subidas salariales pactas en convenio superan el 7,6%”, *El País*, 31 de marzo de 1984. Esta última noticia aportaba, además, unos datos de interés a partir de un informe de CCOO en donde se señalaba lo siguiente: «El estudio de CCOO recoge 240 convenios que afectan a 1,63 millones de trabajadores, con una subida del 7,93%. De estos 240 convenios, 104 son de sector y 136 de empresa. En los primeros se han alcanzado una subida media del 8,06%, y del 7,31% en los segundos. La revisión salarial, según CCOO, se ha recogido en el 21,54% de los convenios suscritos».

¹²¹ Noticia, “Solidaridad ante la crisis”, *El País*, 30 de marzo de 1984.

considerable: 572 convenios que afectaban a 1.116.160 trabajadores¹²². En julio se consolidaban, casi de forma definitiva, todos los peores augurios: según la Subdirección General de Estadística Informática, a partir de 1.025 convenios que afectaban a 247.542 empresas y a más de dos millones de asalariados, presentaba un incremento salarial del 7,78%¹²³. Finalmente, el incremento salarial de 1984 para el conjunto de todos los asalariados se situaría en el 7,81%. 1,31 puntos por encima de la recomendación gubernamental. Lejos de las pretensiones de CCOO –situadas en torno al 10%– cercana a los objetivos de la UGT –en torno a un 8%– y totalmente contrarias a los presupuestos gubernamentales y patronales –quien en su momento había incluso optado por el 5,5%–. La inflación al final del año ochenta y cuatro sería del 11,3% –o deflactado el consumo el 10,6%, véase, de nuevo, la *Tabla 41*– muy lejos de las previsiones iniciales del Gobierno cifradas en torno a un 8%.

A partir de aquí surgen no pocos interrogantes y reflexiones. La propuesta del Gobierno en materia salarial para 1984 no se había andado con contemplaciones: para asegurar la recuperación económica se exigía un nuevo sacrificio valorado globalmente en la pérdida del poder adquisitivo del 1,5% de media, a partir de la recomendación del 6,5% y de una inflación esperada del 8%. La tenaz lucha de los sindicatos no sólo logró rebasar la recomendación del Ejecutivo, apoyada por la patronal, al situarla en el 7,81% sino que evitó, a la postre, que en 1984 hubiera supuesto un descenso de 4,8 puntos de haberse aplicado la recomendación del 6,5% una vez que la inflación real sería de 11,3%. Por más que la frialdad de los datos nos hable de escasas puntos de diferencia salarial medida en porcentaje, que los sindicatos consiguieran 1,31 puntos más en materia de subida salarial constituyó otra parcial victoria. Con todo, la pérdida de poder adquisitivo total sería para aquel año de 3,49%.

1984, en este sentido, volvería marcar otro nuevo record. Tanto en el *Gráfico 46* como en el *Gráfico 47* pueden observarse esta realidad estadística –complementétese lo anterior con los datos de las *Tabla 47*, la *Tabla 48*, la *Tabla 49*, la *Tabla 52* y la *Tabla 53*–. No sólo el año ochenta y cuatro constituye el peor en estos términos para toda la primera legislatura, sino de cara toda la “década del cambio”, en donde se perderían en total -5,72 de poder adquisitivo.

Las anteriores cifras pueden llevar a dos lecturas no contradictorias cuando no complementarías entre sí: por un lado, a pesar de la superación de las previsiones iniciales –tanto en materia salarial como en inflación– el Gobierno conseguiría una moderación salarial –siempre observada, según su propia óptica, en términos de pérdida de poder adquisitivo– más de dos puntos por encima de su cálculos –3,49 frente a 1,5 puntos–. En esta tesitura, entonces, ¿cómo interpretar los resultados finales de las movilizaciones, huelgas y conflictos obreros acaecidos durante 1984 y motivados o no por la estricta negociación colectiva? Difícil respuesta. Sin poder hablar de un fracaso total o relativo, la respuesta de los sindicatos, o mejor dicho del conjunto del movimiento obrero, al menos, sería capaz de atenuar la brutal ofensiva gubernamental, bien acompañada por la estrategia de la patronal de apostar fuerte en la negociación salarial. Y, con todo, no deja de ser paradójico que el año más conflictivo de toda la época socialista en su conjunto, cuando pareció por momentos extenderse una conflictividad social generalizada y la alarmas políticas en relación a la estabilidad política del sistema en su conjunto se encendieron; representara –y de qué forma– el año más aciago para la población trabajadora en su conjunto, incluso por encima de lo acontecido durante la década de los setenta del siglo XX. Llegados aquí, ¿qué sucedió? ¿Fracasó el movimiento obrero? ¿Fue, simplemente, imparable la ofensiva gubernamental? ¿Se frenó, al menos, parcialmente la radical política de moderación salarial? Insistimos, complicado es ofrecer una respuesta unívoca. Todavía más, cuando en aquel tiempo el movimiento obrero no dejaría de emplear, día tras día, su herramienta de trabajo con mayor capacidad de presión.

¹²² Noticia, Rodolfo Serrano, “El incremento salarial medio pactado es del 7,75%, según Trabajo”, *El País*, 9 de mayo de 1984. Una amplia noticia en donde también se daba cuenta de un informe de la CEOE quien calculaba a partir de 557 convenios un incremento del 7,36%.

¹²³ Noticia, “Los convenios firmados hasta mayo registraron una subida del 7.78%”, *El País*, 7 de julio de 1984.

Paradojas o no de la historia desde el inicio de 1984 hasta finales de aquel año, se desarrollaría en las fábricas, en los centros de trabajo, en las calles... miles de huelgas, asambleas, manifestaciones y demás acciones colectivas, que aventuraban, en su conjunto, unos resultados cuando menos diferentes. Veamos, pues, que ocurrió durante aquellos primeros meses. Una primera nota a tener presente: en diciembre de 1983, según datos de un informe de la CEOE, se había experimentado un “notable incremento de la conflictividad” con 226 paros que habían afectado a 312.054 trabajadores y con más de cinco millones de horas de trabajo perdidas. En total, aquello suponía un incremento del 381,1% de la conflictividad en relación al mes de diciembre de 1982¹²⁴.

11.2.3. El movimiento obrero realiza la «puesta a punto»: los inicios del proceso de normalización de la conflictividad (enero 1984)

«Hay otra reacción [frente al Real Decreto-Ley 8/1983, de 30 de noviembre, de *Reconversión y Reindustrialización*], la de los interesados en crear un clima de conflictividad y que, aun a sabiendas de que la medida adoptada era inevitable, exacerban demagógicamente los sentimientos y provocan actitudes de alboroto callejero que, en el fondo, responden a un particularismo realmente insolidario».

Editorial, “Reconvertir es afrontar la realidad”, *El Socialista*, nº 343, (1984, 4 al 10 de enero)¹²⁵.

«Recuerdo una conversación con Corcuera, cuando él era líder a la UGT del Metal, y me decía: ‘¿Cómo un Gobierno socialista va a cerrar una empresa pública? –cuando hablábamos de Potasas de Navarra–. Yo le contestaba: ‘¿Cómo vamos a mantener una empresa de potasio si no hay potasio? Si me pidieras que hiciéramos una reconversión...’ ¡Pero mantener una empresa pública cuyo objeto social ha desaparecido...! ‘No, pero un Gobierno socialista no puede...’, insistía Corcuera con su vehemencia de siempre. ‘Ya –le respondí yo–; pero es que un Gobierno socialista no tiene por qué ser un Gobierno estúpido; tiene que afrontar la realidad y abrir vías de esperanza, y no se abren vías de esperanza manteniendo una actividad ficticia o artificial’».

Felipe GONZÁLEZ, Presidente del Gobierno (1982-1996)¹²⁶.

Desde el mismo día dos enero de 1984 no dejarían de sucederse las noticias al respecto. Así, por ejemplo, *El País* informaba aquel lunes sobre la finalización de la huelga de más de 1.800 trabajadores de las minas Potasas de Navarra, tras más de dos semanas de duración y una vez llegado a un acuerdo temporal. Dependiente del INI, aquella lucha se había centrado en la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo¹²⁷. En todo caso, la noticia más destacada de aquel día venía fuera de las fronteras. La policía francesa había conseguido desalojar, después de tres semanas, a los miles de obreros que habían ocupado la factoría de la Talbot en Poissy, sobre la que pesaba la amenaza de despido de más de 16.000 asalariados. Un conflicto obrero de alcance internacional¹²⁸.

¹²⁴ Noticia, “Conflictividad 1983: un 35 por 100 más de horas perdidas”, *ABC*, 24 de enero de 1984.

¹²⁵ Editorial, “Reconvertir es afrontar la realidad”, *El Socialista*, nº 343, (1984), p. 7.

¹²⁶ Declaraciones de Felipe González en, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., p. 826.

¹²⁷ Noticia, “Termina la huelga de Potasas”, *El País*, 2 de enero de 1984.

¹²⁸ Noticia, “La policía desalojó la fábrica de Talbot en Poissy, ocupada desde hace tres semanas por los obreros”, *El País*, 2 de enero de 1984.

La agenda informativa no sólo estaría copada durante esa navidad por los conflictos obreros. La violencia callejera en forma de delincuencia organizada se venía cobrando no pocas vidas humanas. En 1984 dicha tendencia se incrementaría. “Día de sangre y miedo en Madrid” era el titular del martes 3 de enero del *ABC*. El día anterior morirían dos policías nacionales – José Ángel Requena y Marcelino Clemente Vaquero – en Leganés, junto con un joven acribillado –Jesús González Santiago– en Villaverde Alto (Madrid). Ambos casos estarían relacionados con robos¹²⁹. Una extendida seguridad ciudadana que también sería motivo de no pocas movilizaciones durante los siguientes meses, especialmente por parte del pequeño-mediano comerciante. Mientras tanto, aquel mismo día se podía conocer a través de la prensa diaria como el miércoles 4 de enero habría una huelga en RENFE o CECSA Televisores anunciaría como había iniciado la suspensión de pagos¹³⁰.

Los frentes a los que el Gobierno tenía que hacer frente no dejarían de crecer en la siguiente semana, e incluso cuando todavía se mantenía una muy vaga esperanza de un posible AI’84. El miércoles 11 de enero, la crónica laboral de *ABC* venía cargada de noticias: “El posible cierre de astilleros enfrenta a Administración y sindicatos”¹³¹; “Entrevista Felipe González-Lerma”¹³²; o directamente, “Renfe propone recorte de derechos negociados en anteriores convenios”. Precisamente la compañía del ferrocarril, una de las deficitarias del conjunto del entramado empresarial público, iniciaría toda una ofensiva de cara a ir recortando paulatinamente los programas sociales de sus trabajadores¹³³. Una noticia que se transformaría en un asunto menor, con lo que acontecería el jueves y el viernes de aquella semana, según se pudo leer también en el propio *ABC*: el día jueves día 12 de enero el barrio dormitorio de Leganés (Madrid) amanecía en un escenario dantesco tras la huelga de basuras¹³⁴; el asunto de Aceriales comenzaba a calentarse ante la falta de acuerdo entre las partes¹³⁵; y también se conocía la ocupación de fincas en Andalucía y Extremadura, que encabezada por el Sindicato de Obreros del Campo, protestaban por el nuevo trámite del subsidio de desempleo. Un elemento de discordia que daría lugar a otras tantas movilizaciones en los siguientes meses¹³⁶.

La semana laboral se cerraba todavía más movida. A los jornaleros de Andalucía y Extremadura, se sumaban contra la política agraria del Ejecutivo los agricultores de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). La ocupación de las Cámaras Agrarias y Delegaciones del Ministerio de Agricultura en numerosas ciudades por parte de la COAG se añadía a las nuevas ocupaciones ese mismo día de nueva de fincas por parte del SOC y también por parte de afiliados de CCOO¹³⁷. Mientras tanto empresas referentes como Sagunto, Boetticher o Navarro eran objetos de paros parciales, asambleas, reuniones....

¹²⁹ Portada, “Día de sangre y miedo en Madrid”, *ABC*, 3 de enero de 1984.

¹³⁰ Ambas noticias recogidas en *ABC*: “CECSA Televisores suspende pagos”; “Mañana huelga en Renfe”, *ABC*, 3 de enero de 1984.

¹³¹ Noticia, Vicente Clavero, “El posible cierre de astilleros enfrenta a Administración y sindicatos”, *ABC*, 11 de enero de 1984.

¹³² Noticia, “Entrevista Felipe González-Lerma”, *ABC*, 11 de enero de 1984. Una entrevista en donde el presidente de la Generalitat de Valencia pediría a González el «retraso del cierre de la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo de Sagunto».

¹³³ Noticia, “Renfe propone recortes de derechos negociados en anteriores convenios”, *ABC*, 11 de enero de 1984.

¹³⁴ Noticia, “Leganés: la basura acumulada en las calles”, *ABC*, 12 de enero de 1984.

¹³⁵ Noticia, “Aceriales estudia regulaciones de empleo”, *ABC*, 12 de enero de 1984. Véase lo apuntado en el Capítulo 10, *nota 329*, entre otras.

¹³⁶ Noticia, “Ocupación de fincas”, *ABC*, 12 de enero de 1984. Véase aquí lo anotado en Capítulo 10, *nota 342*.

¹³⁷ Noticia, “Miembros de la COAG protagonizaron ayer movilizaciones en varias provincias”, *ABC*, 13 de enero de 1984.

Todavía más, pues el viernes 12 se informaba como tras el fin del cierre de la factoría de Astano, en El Ferrol, se “recobró ayer [por el jueves] la normalidad, tras el cierre decretado por la dirección el miércoles en previsión de incidentes derivados de las movilizaciones convocadas en el sector contra el cierre de astilleros”¹³⁸. Durante ese mismo fin de semana se conocía, asimismo, las dimisiones de los directores de tres importantes empresas del INI –Endasa, SEAT y Endesa– en una clara muestra de la debilidad por la que atravesaba el Gobierno e Industria, y en concreto el INI con Enrique Moya a la cabeza¹³⁹.

La situación a mediados de enero empezaba a ser meridianamente clara: una conflictividad obrera que crecía en diversos frentes productivos y geográficos, y motivada las más de las veces por reivindicaciones derivada de la defensa de puestos de trabajo o ante las más perentorias consecuencias de la crisis económica. El sábado 14 de enero *El País* informaba de la vuelta del Comité de Empresa de Potasas a la huelga mediante su encierro en la oficina de la empresa, aunque en esta ocasión sin el apoyo de UGT¹⁴⁰; como se volvía a informar de nuevas ocupaciones de fincas unida a cortes de carretera en Sevilla o en Cádiz¹⁴¹; o de los enfrentamientos en los astilleros en Vulcano (Vigo) entre trabajadores y policía; o del anuncio de nuevos paros en Sagunto¹⁴².

Por su parte *ABC* abría su edición del sábado con una portada bajo el rótulo “Crece la conflictividad”. La primera de otras tantas dedicadas al mismo asunto a lo largo del primer trimestre del ochenta y cuatro. Con una fotografía en donde aparecían los agricultores de la COAG en su encierro en el aeropuerto de Barajas, se podía leer lo siguiente: “El Gobierno se reunió ayer para examinar la situación económica de la nación, mientras se extiende la alarma ante la creciente conflictividad”¹⁴³. Como era costumbre, el editorial del mismo *ABC* –“La esperada paz laboral” se titulaba– no dejaba pasar la oportunidad de cuestionar la política del Ejecutivo. Se remarcaba como el clima social estaba “cada vez peor, con mayores dificultades y con incrementos de costes verdaderamente insoportables”, y se apuntaba como el “Gobierno, hacia el que apuntan también las presiones sindicalistas, no gana prestigio y pierde control”¹⁴⁴.

El mapa del conflicto obrero se iría perfilando a lo largo de aquel primer mes de año. Más tras la ruptura de las negociaciones del *non nato* AI’84, a partir del 19 de enero. De hecho, en su segunda mitad los acontecimientos laborales que se van sucediendo resultarían decisivos en la *explosión* de la conflictividad de principios de febrero, cuando entonces sí pareció que la situación social se le escapaba de las manos al Gobierno. Todo ello con una nota a destacar: el incremento de las acciones violentas. Así pues, nuevos frentes se sumaban de Norte a Sur, de Oeste a Este. Por el Norte, por ejemplo, tenía lugar una histórica manifestación el mismo sábado 14 de enero por parte de los trabajadores del sector naval en reconversión o directamente sin trabajo tras cerrarse, nuevamente, Astano por “decisión de la dirección”; en Asturias, la UGT presentaba al presidente del Principado, Pedro de Silva, sus posiciones con respecto a Hunosa; y aquel mismo sábado en Madrid se manifestarían unas dos mil quinientas

¹³⁸ Todas las noticias mencionadas pueden encontrarse en las breves crónicas laborales de *ABC* el día 13 de enero de 1984.

¹³⁹ Véase en el Capítulo 6, *nota* 339.

¹⁴⁰ Noticia, Carmelo C. Ridruejo, “Encierro del comité de Potasas de Navarra ante la falta de un plan de viabilidad”, *El País*, 14 de enero de 1984.

¹⁴¹ Noticia, Alfredo Relaño, “Cortes de carreteras en Badolosa y Trebujena”, *El País*, 14 de enero de 1984.

¹⁴² Noticia, Manuel Muñoz, “Paros en Sagunto contra la regulación de plantilla”, *El País*, 14 de enero de 1984.

¹⁴³ Portada, “Crece la conflictividad”, *ABC*, 14 de enero de 1984. Véase aquel mismo día, Noticia, “Fuerte conflictividad laboral contra la política económica del Gobierno”, *ABC*, 14 de enero de 1984.

¹⁴⁴ Editorial, “La esperada paz laboral”, *ABC*, 14 de enero de 1984.

personas para defender los derechos fundamentales de los trabajadores civiles pertenecientes al Ministerio de Defensa¹⁴⁵.

En paralelo, desde el Ejecutivo se empezaba a reaccionar de forma parcial y no en todos los frentes. Así, sin ir más lejos, el sábado 14 de enero se desalojaban a los agricultores encerrados en Barajas¹⁴⁶, a la par que se detenían a once campesinos quienes habían cortado varias carreteras¹⁴⁷. La represión contra el movimiento obrero iría, pues, *in crescendo*, al mismo tiempo, que se produciría un incremento de la violencia física por parte de los trabajadores en la defensa de sus puestos de trabajo. Una violencia que no terminaría, en la mayoría de los casos, con las propias movilizaciones como se demostraría al día siguiente el domingo 15 de enero en Andalucía, en donde se producirían numerosos cortes de carretera y nuevas ocupaciones de fincas de terratenientes¹⁴⁸. Iniciándose así un bucle en el campo andaluz entre nuevas movilizaciones y más detenciones como la de veinticinco jornaleros el jueves de la siguiente semana¹⁴⁹.

En una progresiva y cada vez más acentuada *soledad* el Gobierno contaría con muy pocos respaldos a su política económica. La mayoría, de hecho, procedería, precisamente, de la derecha en un primer instante¹⁵⁰. En un nuevo editorial del *ABC* el sábado 20 de enero se alertaba de lo siguiente: “Ni éste ni ningún Gobierno de izquierda, en las democracias occidentales, puede salir garante de una conflictividad menor”. Advirtiéndolo al mismo tiempo: “En 1984 puede pasar en España lo que ocurrió en Gran Bretaña con la conflictividad sindical y los Gobierno laboristas”¹⁵¹. Lo cierto es que la semana previa había estado tanta o más ajetreada que la anterior. El miércoles 18 de enero se conocía como 1.500 trabajadores de Ascon habían ocupado el ayuntamiento de Vigo. Ascon junto con Vulcano constituían, en la práctica, la base productiva de Vigo y de las zonas limítrofes¹⁵². Cada vez quedaba más claro el panorama altamente problemático de la reconversión industrial allí donde de iniciaban los planes correspondientes.

Pero no sólo se trataba de reconversión. En Madrid, como en los momentos cumbres de la impresionante oleada conflictiva de los primeros meses de 1976 –y aquí España marcaría el record absoluto de huelgas a nivel europeo en un contexto de profunda debilidad política– el Metro estaba en huelga (de celo). “Caos en el metro: UGT acusa a Comisiones Obreras” era el titular de portada de *ABC* el 20 de enero no exento de cierto dramatismo¹⁵³. Más comedido se mostraría *El País*: “Una huelga de celo semiparalizó el «metro» madrileño”, el mismo día en que, por cierto, se informaba que un ovni había sido avistado en la barriada de San Carlos de Málaga¹⁵⁴. Coincidencias y simbologías similares con la huelga del año setenta y seis, dicho conflicto tenía una proyección fundamental en tal panorama. Si importante era parar la producción, todavía más relevante resultaba paralizar la capital del país. Mientras que para el periódico derechista aquello era la constatación más palpable de la “misma concepción

¹⁴⁵ Todas y cada una de estas noticias se puede encontrar en la sección “Laboral” de *ABC*, 15 de enero de 1984.

¹⁴⁶ Noticia, César Lumbreras, “Desalojados los agricultores encerrados en Barajas”, *ABC*, 15 de enero de 1984.

¹⁴⁷ Noticia, “Detenido en Andalucía once campesinos”, *ABC*, 15 de enero de 1984.

¹⁴⁸ Noticia, “Continúa la agitación social en Andalucía”, *ABC*, 16 de enero de 1984.

¹⁴⁹ Noticia, “Más jornaleros detenidos”, *ABC*, 20 de enero de 1984.

¹⁵⁰ Por ejemplo, Portada, “La reconversión industrial, inaplazable”, *ABC*, 16 de enero de 1984.

¹⁵¹ Editorial, “Quiebra de la concertación”, *ABC*, 20 de enero de 1984.

¹⁵² Noticia, “Trabajadores de Ascon ocuparon el Ayuntamiento de Vigo”, *ABC*, 18 de enero de 1984.

¹⁵³ Portada, “Caos en el Metro: UGT acusa a Comisiones Obreras”, *ABC*, 20 de enero de 1984.

¹⁵⁴ Noticia, “Un ovni sobrevuela Málaga”, *El País*, 20 de enero de 1984.

socialista, que estima la empresa pública como panacea y respuesta a todos los problemas de la economía de mercado”¹⁵⁵; para el Gobierno cada vez más alarmado aquello había que detenerse de cualquier de las formas, vía represiva, vía fomento de la división sindical. Y aquí encontraría, en este caso, la colaboración imprescindible de UGT, quien que no dejaría pasar la oportunidad de acusar a CCOO de querer atacar al Gobierno con fines exclusivamente políticos.

La semana que se inicia el día 23 de enero también estaría repleta de anuncios de movilizaciones y de no pocas manifestaciones. O dicho con otras palabras, se trata de la semana previa de *calentamiento* para lo sucederá a principios del mes de febrero. Entre otros, el conflicto latente de Aceriales tomaría un brusco giro, tras recibirse la comunicación de la recisión de 818 empleos –tan sólo 126 según ABC– y 950 jubilaciones –tan sólo 116 según ABC¹⁵⁶–de los casi nueve mil empleados de la plantilla. UGT y CCOO junto con ELA/STV convocarían una semana de huelga a partir de aquel mismo lunes. La reacción de los trabajadores y sus familiares no tardaría en llegar: el mismo lunes en Hernani en donde estaba una de las cuatro sedes de Aceriales –Pedro Orbeago, SA– saldrían cuatro mil personas a manifestarse en contra de tales despidos¹⁵⁷. El miércoles de aquella semana –25 de enero– CCOO en solitario convocaría una exitosa huelga en el sector naval. 32.000 de los cerca de 40.000 trabajadores participarían en la jornada de paro contra la regulación de empleo y contra los incumplimientos de los acuerdos ya firmados¹⁵⁸. En El Ferrol, en Sevilla, en Cádiz, en Sestao, en Vigo... las dimensiones del paro serían considerables.

En el apartado de anuncios de futura movilizaciones, tanto el día 2 como 3 de febrero cada vez aparecían más señalados en lo que constituía, sin ningún género de dudas, un incremento generalizado de la conflictividad. Especialmente relevante empezaba a visualizarse lo que sucedería el jueves 2 de febrero, al convocar CCOO un nuevo paro para el sector Naval; y también CCOO y USO, aunque sin el apoyo de UGT, cuando convocaban una huelga general en Getafe para desatascar la parálisis negociadora en la que se encontraba la solución a la empresa Kelvinator. Al respecto de este último caso –como exponente de otros tantos– en ABC se señalaba como más de mil personas, sin previo aviso, “se manifestaron por las calles de la ciudad [el miércoles 25 de enero] y cortaron el tráfico de la carreta Madrid-Toledo durante media hora”. Un paso previo a las movilizaciones de inicios del mes siguiente¹⁵⁹. Con preocupación desde el mismo ABC en un editorial se afirmaba–tras repasar la supuesta división interna del socialismo español– lo siguiente: “[E]l país parece orientarse hacia un acelerado proceso de huelga general, alentando desde las mismas esferas partidistas y sindicales del propio Gobierno”. Concluyendo con una perentoria petición de *mano dura* por parte del Gobierno ante la cada vez más inestable situación política y económica del país:

«Quien tiene títulos, representatividad y legitimidad para ello debería cuanto antes, en bien de la economía nacional y de la estabilidad del sistema democrático poner orden y marcar la dirección hacia las realidades»¹⁶⁰.

Se mirara por donde se mirara la conflictividad laboral no hacía más incrementarse. En El Ferrol, el viernes 27 de sábado, más de 8.000 personas, incluidos centenares de niños, habían

¹⁵⁵ Editorial, “Huelga en el Metro”, ABC, 20 de enero de 1984.

¹⁵⁶ Noticia, “Aceriales”, ABC, 24 de enero de 1983.

¹⁵⁷ Noticia, “Convocada una semana de huelga en aceros especiales”, El País, 23 de enero de 1984.

¹⁵⁸ Noticia, “Movilizaciones en las empresas afectadas por la reconversión”, ABC, 26 de enero de 1984; Noticia, “Miles de trabajadores secundaron la convocatoria de huelga contra el plan de reconversión naval”, El País, 26 de enero de 1984.

¹⁵⁹ Noticia, “Huelga general en Getafe”, ABC, 26 de enero de 1984. Por cierto, en aquellos *breves laborales* se informaba, de nuevo, como los trabajadores de la empresa Potasas de Navarra había convocado una huelga para aquel mismo día tras el fracaso del último intento negociador.

¹⁶⁰ Editorial, “La dirección del Gobierno”, ABC, 27 de enero de 1984.

realizado una *cadena humana* de 20 kilómetros por la carreta nacional en contra del plan de Reconversión Naval, dejando incomunicada durante dos horas El Ferrol,¹⁶¹; en Bilbao el mismo día más de 10.000 trabajadores se manifestarían contra los planes de reconversión¹⁶². Una manifestación que terminaría con considerables incidentes violentos¹⁶³.

Prácticamente con la misma intensidad con que las movilizaciones obreras se multiplicaban, con similar perseverancia Miguel Boyer se reafirmaba en la retórica de la “única política posible”. Bien acompañado, en cualquier caso, por el aparato del Partido, con Manuel Chaves a la cabeza¹⁶⁴. También se conocería el sábado 28 que la patronal del metal – Confemetal– había distribuido un práctico manual secreto, que bajo el título, *El empresario ante la huelga, prontuario legal y práctico*, daba instrucciones e indicaciones para actuar en caso de conflicto, y en donde la consigna principal, lógicamente, era evitar que se parara la producción¹⁶⁵. Todo un síntoma de la situación social del momento.

Lo que, a buen seguro, no contaba aquel práctico manual era qué hacer en caso de secuestro de los propios gerentes empresariales, tal y como sucedería el viernes de esa semana en Pontevedra con diez directivos de Ascon –Astilleros y Construcciones, SA–. Liberados a las 19 horas en perfecto estado, en todo caso aquel acontecimiento suponía un nuevo peldaño en la radicalización de las movilizaciones obreras. Una radicalización con “óptimos resultados”. Pues como se contaba desde *El País*, la asamblea de los trabajadores de la factoría de Meira tan sólo depusieron su actitud tras alcanzar el acuerdo del plan del Comité de Empresa, en donde se “aceptó la petición formulada por tres directivos, que habían salido de los astilleros para ingresar el dinero adeudado a 108 trabajadores, en concepto de seguro de desempleo, desde diciembre”¹⁶⁶. En cualquier caso, dicho suceso despertaría ya no las *alarmas* sino las *iras* de parte de los principales medios de comunicación de la nación, empezando –¡cómo no!– por ABC. Bajo el título, “Secuestro de empresarios”, comenzaba su diatriba editorial con las siguientes reflexiones: “La consumación de un delito anula cualquier aspecto de pretensión razonable que pudiera tener el fin que indujo a cometerlo”. Añadiendo: “Por una vía delictiva jamás se realiza la Justicia”. Preocupados por la integridad de los empresarios, aquel editorial, concluía: “El caso de Ascón, si se deja impune, creará un peligroso precedente”¹⁶⁷.

La última semana de enero terminaría con la difusión de los principales datos macroeconómicos de 1983 –en resumen, incremento del paro y del déficit público y una inflación descontrolada– pero sobre todo con una extendida sensación de que el Gobierno se veía desbordado ante la multiplicación de conflictos, empezando por el mismo control del orden público y político. Así en Sagunto, la Diputación de Valencia se veía obligada a nombrar una gestora municipal tras dimitir la mayoría de los concejales del Ayuntamiento, en solidaridad con el expediente de regulación de empleo de AHM¹⁶⁸. Tampoco contribuía, precisamente, a generar un marco de estabilidad social, hechos como los sucedidos en Llodio y

¹⁶¹ Noticia, “Movilizaciones en El Ferrol contra la reconversión naval”, ABC, 28 de enero de 1984.

¹⁶² Noticia, “10.000 trabajadores metalúrgicos se manifiestan en Bilbao”, *El País*, 28 de enero de 1984.

¹⁶³ Noticia, “Benegas, contrario a la rescisión de contratos en Aceriales”, ABC, 29 de enero de 1984.

¹⁶⁴ Noticia, “El Gobierno mantiene inalterable sus planes sobre reconversión industrial, afirman Miguel Boyer y Manuel Chaves”, *El País*, 28 de enero de 1984.

¹⁶⁵ Noticia, “La patronal del metal distribuye entre sus empresas una guía para actuar en una huelga”, *El País*, 28 de enero de 1984.

¹⁶⁶ Noticia, María José Porteiro, “Los trabajadores de Ascon liberaron a los directivos tras 19 horas de secuestro”, *El País*, 28 de enero de 1984.

¹⁶⁷ Editorial, “Secuestro de empresarios”, ABC, 28 de enero de 1984.

¹⁶⁸ Noticia, “La Diputación de Valencia nombrará una gestora municipal en Sagunto”, ABC, 29 de enero de 1984.

Andoain donde se cortaron carreteras y ferrocarriles o manifestaciones en Bilbao y en San Sebastián, lugar este último en donde destrozaban las viviendas de dos directivos de la empresa Pedro Orbegozo, y en el que también se agrediría a la esposa de uno de ellos. Incidentes todos ellos relacionados con la reconversión en Aceriales¹⁶⁹.

Por otro lado, la situación del campo andaluz no dejaba de empeorar. A los 150 jornaleros encerrados en la Catedral de Sevilla –en donde cinco estaban en huelga de hambre¹⁷⁰–se sumarían 30 en la de Jerez, más de 300 en la iglesia de Trebujena y unos cuarenta en el Ayuntamiento de Puerto Serrano contra la política de empleo comunitario¹⁷¹. En este caso concreto, se emplearía una táctica represiva tanto más diferente como efectiva en parte: la represión económica. Las fianzas de más de un millón de pesetas para cada uno de los 16 detenidos de CCOO en Lorca del Río, tendrían un *efecto* no deseado: incremento de los encierros en iglesias y en varios ayuntamientos. Con todo, una vez obtenida una más que una notable rebaja de la fianza a 25.000 pesetas, los mismos detenidos también se encerrarían con sus compañeros para seguir protestando¹⁷². A lo anterior se sumaría la convocatoria de una huelga general en todo el campo en Andalucía para el día 2 de febrero y un nuevo calendario de ocupaciones de fincas¹⁷³. Y, mientras tanto, al jueves 2 de febrero se seguían sumando convocatorias como la de los trabajadores y vecinos de Sagunto de cara a una nueva huelga general¹⁷⁴.

Concluía aquel enero de 1984 en un ambiente de movilización generalizada y, prácticamente, en un contexto de preparación de una huelga general estatal, que, en todo caso, ningún sindicato representativo –empezando por las propias Comisiones Obreras– habían estimado convocar, por muy diversos motivos políticos, organizativos y estratégicos. Pero además durante estos días el repertorio de acción colectiva de los trabajadores se ampliaría considerablemente: no se trataba ya de asambleas, movilizaciones, encierros, sino también de secuestros de directivos, de huelgas de hambre, de destrozos callejeros. Una radicalización y una violencia que no sólo cuestionaba la legitimidad del Ejecutivo, sino que cada vez levantaba una mayor alarma social entre la clase política y económica dominante. Alarmas que saltarían totalmente tras lo que acontecería el 2 y el 3 de febrero.

“A lo largo del mes de febrero se perdieron 1.500.000 jornadas de trabajo por huelgas, según declaró ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, lo que supone seis veces más que el mismo mes de 1983”, informaba *El País*, un 13 de marzo de 1984¹⁷⁵.

¹⁶⁹ Noticia, “Cortes de carreteras y ferrocarril en la segunda semana de huelga de Aceriales”, *ABC*, 31 de enero de 1984.

¹⁷⁰ Noticia, “Aumenta el número de encerrados en la catedral de Sevilla”, *El País*, 30 de enero de 1984.

¹⁷¹ Noticia, “Jornaleros”, *El País*, 31 de enero de 1984.

¹⁷² Noticia, José Aguilar, “Aumenta el número de jornaleros en la catedral de Sevilla al cumplirse el décimo día de encierro”, *El País*, 1 de febrero de 1984.

¹⁷³ En otro claro ejemplo de interpretación sesgada desde las páginas de *El Socialista* se trataría de proporcionar una ‘explicación coherente’ sobre el problema del campo andaluz en el número 347 correspondiente a la primera semana de febrero. Allí se repetían los argumentados tantas veces expuestos: se trataba de una campaña con motivaciones políticas, alejada de la realidad y protagonizadas por el SOC y CCOO –de quien se resaltaba su división interna– se estaban situando fuera de los límites de la ‘legalidad’: BELMONT, R., “El «clímax» andaluz”, *El Socialista*, nº 347, (1984), pp. 24-25. Véase también lo apuntado en su momento en el Capítulo 10, *nota 342*.

¹⁷⁴ Noticia, “Nueva huelga general de los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo”, *El País*, 31 de enero de 1984.

¹⁷⁵ Noticia, “En febrero se perdieron un millón y medio de jornadas por huelga, según Almunia”, *El País*, 13 de marzo de 1984.

Febrero superaría todas las marcas: un incremento de la conflictividad del 400%¹⁷⁶. Un mes que se inauguraba con un mitin-manifestación a mayor gloria del presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, quien se retiraba de su cargo tras el no cuestionable mérito de haber reconstruido el tejido organizativo empresarial tras el fallecimiento del dictador Franco. Ante más de 1.500 empresarios mandaría un mensaje alto y claro al Gobierno socialista: “Nos tendrán enfrente y no como mansos corderos” como recogía con indisimulado *orgullo ABC* en su portada del primer día de febrero¹⁷⁷. En un día de relativa tranquilidad informativa con respecto a la conflictividad laboral, tan sólo *El País* recogía algunas movilizaciones como la de los vecinos de El Ferrol y la comarca limítrofe —que apagarían las luces de sus casa siguiendo la convocatoria del comité de empresa de Astano—; la numerosa y pacífica manifestación en Vigo con más 10.000 manifestantes; así como los pequeños disturbios en Basauri por una concentración de los trabajadores de SA Echevarría del grupo Aceriales¹⁷⁸.

11.2.4. Comisiones Obreras en primera línea: del estallido de la «alarma social» a la elaboración de la respuesta política, jurídica y político-militar (febrero 1984)

«Por esa burla de CCOO, que además, socava la capacidad de acción sindical de los trabajadores y que objetivamente favorece a quienes tienen interés en desarticularlo, hay que pedir cuentas, hay que exigir responsabilidades. Hay que denunciar las motivaciones políticas ilegítimas que llevan a CCOO a sabotear las posibilidades de concertación con reivindicaciones económicamente irrealizables, planteadas a sabiendas de lo que son».

Editorial, “La solidaridad se demuestra con hechos”, *El Socialista*, nº 346, (1984, 25 al 31 de enero)¹⁷⁹.

El enfrentamiento prácticamente visceral entre las direcciones confederales CCOO y UGT, y sus respectivas federaciones del Metal, llevarían a la convocatoria de una doble jornada de lucha entre los días 2 y 3 febrero, prácticamente, destinada a los mismos sectores y con muy parecidas reivindicaciones en lo fundamental. CCOO el jueves y UGT el viernes¹⁸⁰, respectivamente. Una división que restaría impacto a las movilizaciones en su conjunto. La decisión de la UGT de no convocar junto con Comisiones Obreras, se sustentaría en su tesis de la *responsabilidad* con la *salida progresista a la crisis*, frente a la que se suponía que era las movilizaciones politizadas, radicalizadas y con el objeto de derribar al Gobierno encabezadas por CCOO.

Por cierto, aquella jornada de lucha ugetista sería la primera y la última a lo largo de largo I Trimestre de 1984. Una decisión que se ha de enmarcar dentro de su inicial estrategia desmovilizadora gradual que ganará enteros durante las dos siguientes semanas, hasta renunciar, en la práctica, a seguir actuando como un *agente movilizador*. O explicado con las palabras de Luis Enrique Alonso:

¹⁷⁶ Noticia, “Solidaridad ante la crisis”, *El País*, 30 de marzo de 1984.

¹⁷⁷ Portada, “Ferrer: «Nos tendrán enfrente y no como mansos corderos»”, *ABC*, 1 de febrero de 1984.

¹⁷⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “Convocada una doble jornada de protesta en toda España en los sectores en reconversión”, *El País*, de febrero de 1984.

¹⁷⁹ Editorial, “La solidaridad se demuestra con hechos”, *El Socialista*, nº 346, (1984), p. 7.

¹⁸⁰ En este sentido, véase la *posición a la ofensiva* que se adoptaría el Comité Federal extraordinario de la Federación del Metal de UGT en su reunión del 17 de enero: “Denuncia de la actitud patronal”, *Unión*, nº 46, (1984), p. 8. En donde se podía leer: «El Comité Federal entiende que la actitud de la patronal es totalmente denunciante, pues cualquiera que sea la política de un Gobierno, siempre hay un margen de negociación, que es el que a través de los convenios colectivos se va a tratar de conseguir».

«siendo la UGT el sindicato que de una manera más o menos directa estabiliza socialmente la política económica del gobierno a partir de 1983, al ofrecer su apoyo incondicional a una salida negociada y moderada de la crisis utilizando sus cuadros para legitimar, difundir y hacer operativa socialmente la política de máxima racionalización productiva llevada a cabo por las agencias gubernamentales»¹⁸¹.

Una posición, la de UGT, que terminaría favoreciendo los intereses y la posición inamovible del Gobierno –a pesar de su frontal choque en relación a los excedentes de plantilla de las empresas en reconversión con dimisión de Carlos Solchaga incluida aunque no admitida¹⁸²–. “La reconversión industrial sólo puede hacerse con UGT y con sus propuestas”, sentenciaría en aquellos días Antonio Puerta, secretario de la Federación Metal de la central socialista¹⁸³.

Por lo demás, desde el Ejecutivo se centrarían sus *esperanzas* en cómo, a corto plazo, el movimiento huelguístico se desinflará por sí mismo o cuando al menos no alcanzaría una repercusión no controlable. Más aún, pues los socialistas una vez instalados en el poder, actuarían en nombre del llamado *estado de Derecho* por delante, empleando los mecanismos de consenso y dominación que considerarían oportunos¹⁸⁴. La fuerza coercitiva del Estado, independientemente del *color político* del ejecutivo de turno, volvería a aparecer plenamente. Y, por otro lado, se iniciaría una brutal campaña de deslegitimación política de las movilizaciones por parte del *entorno socialista* con argumentos de todo tipo, algunos de ellos escasamente progresistas o solidarios. Desde el Estado y desde el Partido el enemigo a batir estaba claro: la parte del movimiento obrero más combativo, y dentro de él, las Comisiones Obreras.

En todo caso, mucho ayudaría a las pretensiones gubernamentales la falta de proyección estatal de ese conjunto de movilizaciones. Por un lado, estaría la centralidad de la reconversión industrial, y, por otro, en un lugar secundario, el tradicional problema del campo. O dicho, en otras palabras, aquellos conflictos no serían capaces de generar por sí mismos una plataforma común contra la política económica del Gobierno. De esta forma, la fragmentación geográfica de los conflictos también sería determinante.

En el examen de estos días ninguna fuente como el *ABC* nos ayuda a observar de forma tan clara la contradicción de las relaciones capital-trabajo a través de sus portadas. Incluso la del día 2 vendría a constituirse en una especie de llamamiento a las diversas convocatorias: “Movilizaciones obreras contra el Gobierno”. Con una fotografía de la protesta de los trabajadores de Aceriales en Vitoria custodiados por la Ertzaina. El mismo en que se conocía la remodelación más amplia del equipo económico de Boyer, en donde Jordi Sevilla saldría del mismo, tras negarse a amoldar a los intereses de los poderes económicos el que se conoció como el “decreto-ley del dinero negro”¹⁸⁵; el periódico monárquico se lanzaba a la *yugular* del núcleo del poder del socialismo: “Esta conflictividad nace de varias causas endógenas, generadas en el seno del PSOE”. No termina ahí: el “Gabinete pierde autoridad y crédito para

¹⁸¹ ALONSO, Luis Enrique, “Conflicto laboral y cambio social” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales...*, op.cit., pp. 405-406.

¹⁸² Véase lo apuntado en el Capítulo 7, *nota 162*.

¹⁸³ Noticia, “Los sindicatos convocan para hoy nuevas acciones”, *El País*, 3 de febrero de 1984. No terminaban ahí las diatribas de puerta para justificar la posición de UGT: «Son las empresas las que tienen que reconsiderar sus posturas respecto a las rescisiones. El Gobierno lo único que hace es aprobar los expedientes presentados. Y en todo caso, la responsabilidad primera es de las empresas, y luego del Gobierno». Véase aquí de nuevo, MARÍN ARCE, José M^a, “La fase dura de la reconversión industrial: 1983-1986” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura...*, op.cit..

¹⁸⁴ Nos remitimos a lo apuntado y desarrollo en la *Presentación*.

¹⁸⁵ Sobre esta cuestión véase lo apuntado en su momento en el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”.

imponer la paz laboral” y hablaba de “[p]eligroso juego”, reclamando a su vez una “política enérgica” y de “autoridad” para garantizar la “paz laboral”¹⁸⁶.

¿Cuáles fueron los titulares de *El País* y del *ABC* tras las jornadas del 2 de febrero? Mientras que *El País* lo llevó a su primera página –“Manifestaciones de trabajadores y críticas patronales contra la política del Gobierno”–; por su parte *ABC* directamente omitió el asunto. Un sintomático silencio mediático en el que quizás fuera el momento culmen de la conflictividad laboral durante toda la primera legislatura socialista. Pero, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron los datos que se manejaron tras aquella jornada? Para CCOO principal agente movilizador más de 400.000 trabajadores habían acudido a los paros y más de 100.000 personas se habían manifestado en las diferentes convocatorias por el país. En el Norte, en Gijón, la convocatoria de huelga había sido un éxito total. En torno al 95% por de la población había participado, y ello a pesar de que la UGT se había desmarcado. Una jornada de movilizaciones que más allá de los dos heridos en los no pocos enfrentamientos que se habían producido entre cortes de carreteras, apedreamientos varios y algún que otro vuelco de camiones, concluiría con una más que exitosa manifestación con 20.000 personas. En Vigo participarían entre 8.000 a 10.000 personas en la manifestación y con la vista puesta a la preparación de la huelga del 14 de febrero. En El Ferrol participarían 15.000 personas en la manifestación, en donde al cierre de las industrias y la paralización de los transportes se sumaría el cerrojo de los comercios. En el Sur confluían tanto las movilizaciones de los jornaleros como las protestas por la reconversión. Con paros de un enorme seguimiento en los astilleros de Puerto Real, Huelva y Cádiz, la jornada se cerraría también allí con otro rotundo éxito. En paralelo, en el campo, las movilizaciones subirían otro peldaño. Huelgas generales o parciales, encierros, manifestaciones, ocupación de fincas se llevarían a cabo por separado o de forma conjunta contra el subsidio del empleo agrario. Mientras que la Delegación del Gobierno cifraba las movilizaciones en 15.000 personas distribuidas en 57 pueblos, CCOO elevaría la cifra a 87 pueblos y otros tantos miles de manifestantes. En Getafe la jornada a de huelga general local concluiría con un similar final. Tanto en el polígono como en el pueblo se paralizaría la producción¹⁸⁷. Entre 1.500 a 10.000 personas –dependiendo de las cifras dadas por el Ayuntamiento o por CCOO, respectivamente– participarían en una concentración en el pueblo del entonces conocido como el “cinturón rojo” –hoy ya desaparecido–. Y entre 20.000 a 50.000 –dependiendo aquí de nuevo de las fuentes, *El País* o CCOO, respectivamente– marcharían en la manifestación la tarde del día 2 de febrero por la capital de la nación. Al mismo tiempo habría paros parciales en las fábricas de Talbot, Boelticher o Intelsa. En Sagunto tendría lugar otro paro total, secundado por prácticamente todos los trabajadores, y cuya jornada de protesta se cerraría en Valencia con una manifestación con más de 12.000 personas¹⁸⁸. O dicho con otras palabras, aquella sería un día de lucha muy cercano a lo que pudiera considerarse como una huelga general, pero en donde sobre todo se mostraría una amplia respuesta social a los diferentes llamados.

Para rematar la jornada, los empresarios madrileños agrupados en torno a la CEIM montaban un nuevo mitin-concentración de la patronal en Madrid en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid con la asistencia de más de 2.200 empresarios, previo pago de entrada de 5.000 pesetas de las de entonces. “La política económica del Gobierno es muy poco sensible

¹⁸⁶ Editorial, “Mayor conflictividad”, *ABC*, 2 de febrero de 1984.

¹⁸⁷ Sobre la potencialidad del movimiento obrero en la citada localidad véase el trabajo de, SÁNCHEZ POZO, José Luis y SÁNCHEZ PÉREZ, José Luis, *Resistencia política y conflictividad social: Getafe 1939/76*, Getafe, Ayuntamiento de Getafe, 2007.

¹⁸⁸ Información recopilada a través de, Noticia, José Aguilar, “Huelgas y encierros en el campo andaluz”, *El País*, 3 de febrero de 1984; Noticia, “Medio millón de trabajadores secundó ayer la jornada de protesta contra la política de reconversión industrial”, *El País*, 3 de febrero de 1984; Noticia, “Manifestaciones de trabajadores y críticas patronales contra la política del Gobierno”, *El País*, 3 de febrero de 1984; Noticia, “Numerosas huelgas y manifestaciones contra la reconversión industrial”, *ABC*, 3 de febrero de 1984.

con el empresariado y en nuestra opinión creará más paro”, afirmaría en aquella ocasión José Antonio Segurado, presidente de la patronal de Madrid, quien también señalaría que el Gobierno –compuesto por “políticos de tercera división”– estaba llevando a cabo un *plan de estabilización de caballo*¹⁸⁹.

ABC ya se tomaría más en serio las movilizaciones obreras al día siguiente. El sábado 4 de febrero de 1984 abría su portada bajo un inquietante titular: “Grave tensión en las Vascongadas”. Y con una imagen que infundía un terrible miedo en una parte de la sociedad más conservadora: el centro de la ciudad de San Sebastián con una barrida de neumáticos ardiendo en medio de sus calles. “[C]on la actuación de piquetes, se desató la violencia y se produjeron cortes de carreteras y vías férreas y barricadas en varias ciudades”, se leía también en aquella portada¹⁹⁰. En cambio, *El País* evitaba mayores dramatismo: “Huelga en el País Vasco contra la reconversión industrial”, al mismo tiempo que anunciaba con la misma importancia informativa lo siguiente: “Miguel Boyer reitera que este año se hará la reconversión pese a sus costes sociales”. Matizando ya en la información: “El año pasado ha sido el año de la mentalización, pero pese a la dureza de las situaciones, la reconversión se iniciará inmediatamente”. Así pues, el mismo Ministro de Economía que aparecía en público impasible e ignoraba las movilizaciones obreras, en todo caso, dejaba el oportuno hueco a la esperanza: “La destrucción de empleo parará este año”¹⁹¹. Por parte del Gobierno, poco más reacciones se producirían en un momento de alta tensión sociolaboral.

La jornada de movilizaciones del 3 de febrero desplazaría el mapa del conflicto hacia el Norte. Principalmente en Vizcaya y Guipúzcoa, en donde el éxito del paro en el sector metalúrgico prácticamente sería total, tras la convocatoria conjunta de ELA/STV, CCOO y UGT en esta ocasión. También tendría cierta notoriedad en algunas comarcas en Álava o en parte de Navarra –en concreto en la fábrica Laminaciones de Lesaca (Navarra) en donde sus 2.400 trabajadores pararían la producción–. Con algunas ramificaciones en parte del comercio, banca y enseñanza ante la presión de los piquetes, la jornada terminaría con una manifestación de más 15.000 personas, en donde también participaría LAB¹⁹². Mientras tanto, en el campo andaluz la agitación social no dejaba de avivarse. A las nuevas ocupaciones de fincas –Huelga, Jaén o en Córdoba– se sumaría diversos encierros, concentraciones así como saldrían en libertad provisional cuatro líderes de CCOO del Campo de Huelga tras pagar entre 20.000 a 60.000 pesetas¹⁹³. Con todo, aquel 3 de febrero sería, en términos de conflicto, mucho más tranquilo que el jueves 2 de febrero.

Tras tanto movimiento vendría una semana –entre el 4 al 10 de febrero– de relativa tranquilidad, teniendo siempre presente que no pasaba un solo día sin una huelga, sin una manifestación... Además al conflicto estrictamente relacionado con la reconversión industrial o el campo andaluz¹⁹⁴ –los dos principales motores de la movilización– vendría ahora a añadirse con toda su fuerza la conflictividad relacionada con la negociación colectiva, convenio por convenio, de los alrededor de 3.600 que se tenían que negociar. Según un amplio reportaje de

¹⁸⁹ Noticia, Jesús Cacho, “Los empresarios madrileños criticaron frontalmente la política económica del Gobierno”, *El País*, 3 de febrero de 1984.

¹⁹⁰ Portada, “Grave tensión en las vascongadas”, *ABC*, 4 de febrero de 1984.

¹⁹¹ Noticia, Joaquín Estefanía, “El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, asegura que este año se hará la reconversión industrial”, *El País*, 4 de febrero de 1984.

¹⁹² Noticia, Patxo Unzueta, “Huelga generalizada en el metal del País Vasco en contra de las rescisiones de empleo y de la política de reconversión”, *El País*, 4 de febrero de 1984.

¹⁹³ Noticia, Jesús Aguilar, “Continúan los encierros y ocupaciones de fincas protagonizados por jornaleros andaluces”, *El País*, 4 de febrero de 1984.

¹⁹⁴ De esta forma, y en aquellos mismos días, otros seis jornaleros se sumaban a la huelga de hambre que dos de sus compañeros venían manteniendo desde el 23 de enero. El motivo: la negativa de Joaquín Almunia a recibirlos. Noticia, “Seis jornaleros se suman a la huelga de hambre en la catedral de Sevilla”, *El País*, 5 de febrero de 1984.

El País cerca de 1.200.000 millones trabajadores estaban negociando sus convenios colectivos, en un contexto de “oleada de conflictividad en la práctica totalidad de empresas y sectores que discuten actualmente sus convenios”. En lo que se aventuraba como una *escalada de movilizaciones* venía a presentar un “negro” panorama tan sólo con la convocatorias de movilizaciones y huelgas en el transporte aéreo –Iberia¹⁹⁵ y Aviaco– y ferroviario –Renfe y FEVE¹⁹⁶, o en otros tantos sectores como el sector de limpieza pública¹⁹⁷, al que pronto se sumaría la construcción, el Metro de Madrid y un largo etcétera. Para empeorar las cosas, la conflictividad laboral tomaba un mayor grado de intensidad en las empresas públicas, ante el desconcierto de la propia UGT siempre tan solícita a llegar a acuerdos *razonables*; mientras que Comisiones Obreras, llegado este punto, no estaba dispuesta a reducir la presión y anunciaba nuevas movilizaciones tanto en el sector privado como en el público¹⁹⁸. Celebrada la reunión de su Consejo Confederal, establecería un nuevo calendario de movilizaciones para las siguientes semanas con el objetivo de derogar el decreto-ley de reconversión e ir hacia una nueva negociación en relación a los excedentes de plantilla¹⁹⁹. Conjunto de movilizaciones con un fin similar en lo estratégico y en lo organizativo a lo que había ocurrido a principios del mes de febrero: ir concentrando energías de cara a mostrar la capacidad de convocatoria para el 6 de marzo, fecha elegida para una nueva demostración de fuerzas bajo la clásica táctica de presión-movilización-negociación²⁰⁰.

De vuelta a los centros de trabajo, a la calle, la siempre parcial relativa tranquilidad con la que había transcurrido aquella semana del 4 al 9/10 de febrero, y en donde los principales agentes sociales habían ido redefiniendo su estrategia sobre la marcha; en la ciudad de Madrid –eje siempre central de cualquier reivindicación del tipo que sea– se vería interrumpida. Para el jueves 9 de febrero estaba convocada una huelga general del metal en Madrid. Mientras que *ABC* en aquella ocasión resolvió el “engorro” en no más de siete líneas, *El País* se haría eco del poder de movilización del sector: “Más de 70.000 trabajadores participaron ayer en la huelga del metal de Madrid”. La cifra del paro la subían los sindicatos a 100.000, aunque para la patronal –al igual que para *ABC*– la jornada de lucha no había tenido repercusión ninguna. En Barcelona, en aquella ocasión, también se movilizarían unos 4.000 trabajadores. El motivo, los motivos, la negociación de los convenios colectivos y los problemas de la reconversión. Pero también en aquel 9 de febrero los trabajadores de AHM Sagunto se manifestaron en Madrid –a la par que de nuevo en Sagunto en una nueva jornada de huelga que paralizaría la ciudad, desde la fábrica, pasando por los comercios e inclusive hasta el propio Ayuntamiento²⁰¹– en lo que terminó por convertirse en una lucha campal contra la policía: “Trece heridos, dos ellos graves –una mujer y un policía nacional– y otras dos personas detenidas fue el balance los enfrentamientos registrados ayer en Madrid”, según informaba *El País*. El mismo medio de comunicación –*ABC* ni siquiera hacía mención del asunto– haciendo eco exclusivamente de *informaciones oficiales*, informaba, “a algunos manifestantes les fueron ocupados cuchillos de

¹⁹⁵ Véase, asimismo, el *plan alternativo* que se elaboraría por parte de UGT: MESA, Inmaculada, “Iberia podría ahorrar 19.000 millones”, *Unión*, nº 46, (1984), p. 9.

¹⁹⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “1.200.000 trabajadores negocian sus convenios colectivos en medio de una creciente conflictividad”, *El País*, 9 de febrero de 1984.

¹⁹⁷ Noticia, “Próxima movilización en el sector de limpieza de Madrid”, *El País*, 7 de febrero de 1984.

¹⁹⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los sindicatos convocan movilizaciones en el sector público, mientras que la Administración tiene el tope salarial del 6,5%”, *El País*, 8 de febrero de 1984.

¹⁹⁹ AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión del Consejo Confederal del día 08-02-1984”, sig. 2-11. Junto con la resolución: “Movilizaciones en contra de la política industrial del Gobierno”.

²⁰⁰ Noticia, “CCOO convoca acciones contra la reconversión”, *El País*, 10 de febrero de 1984.

²⁰¹ Noticia, Manuel Muñoz, “Nueva huelga general en Puerto de Sagunto”, *El País*, 10 de febrero de 1984.

cocina, navajas automáticas, piedras y una gran cantidad de bolas de acero [...]. Dos personas fueron detenidas, una de ellas, el presunto autor del martillazo al policía nacional”²⁰².

Allí donde los conflictos se habían incrustado en el mismo tejido productivo y social de cada localidad afectada por la reconversión, la negociación colectiva y otros tantos problemas ya endémicos, la represión pura y dura antes de desactivar los conflictos los revitalizaría en una espiral de acción-represión-acción. Sagunto, de nuevo, es otro buen ejemplo. Al día siguiente de la carga –en donde ya eran 17 los policías heridos– tendría lugar una impresionante asamblea de más de 10.000 vecinos en la ciudad valenciana²⁰³. No sólo allí los trabajadores y vecinos pidieron la dimisión del Delegado de Gobierno de Madrid, sino que era tal la capacidad de presión que en el reporte de *El País* se indicaba: “El presidente del Comité de Empresa de AHM, Miguel Campoy, manifestó ayer que la Dirección General de Empleo sugirió la posibilidad de declararse incompetente en el cierre de instalaciones y, por tanto, inoperante respecto del expediente que presenta la dirección de la empresa”²⁰⁴.

También en aquellos días, antes de cruzarse el meridiano del mes de febrero, no dejarían de sucederse incidentes violentos que habitualmente terminaban en considerables enfrentamientos entre trabajadores y cuerpos del orden público. Por tan sólo citar dos ejemplos: el día 9 la Guardia Civil había tenido que disolver a los trabajadores de Pedro Orbeago –del grupo Aceriales– cuando procedían a colocar barricadas la carretera de Andoin. Una movilización acompañada, además, por una huelga de hambre de cuatro trabajadores que entonces ya llevaban 14 días²⁰⁵. Al siguiente día dos trabajadores de Montajes Herrerías, una de las empresas auxiliares de Astilleros Santander, resultaban heridos tras una manifestación de más de más de dos centenares de trabajadores, que terminaría en otra autentica batalla campal por el centro Santander²⁰⁶.

Por lo demás, el conflicto en el campo andaluz seguía consolidándose y extendiéndose. Con sus ritmos propios, sus características autónomas, a las huelgas de hambre se iban a sumar en tan sólo una semana otros cinco detenidos de CCOO de Huelva, entre los que estaba el mismo Alcalde de Bollullos del Condado, Diego Valderas, acusado –como sus compañeros– de los cortes de carretera en los días previos. Aquí, de nuevo, la represión policial, judicial y económica –ya había 29 jornaleros procesados en las anteriores semanas, a lo que había que sumarse unas considerables cantidades de dinero para obtener su libertad condicional– se mostraría escasamente efectiva, al menos, a corto plazo. A la detención de estos cinco militantes les siguieran una manifestación junto con un encierro de más de 200 mujeres en varios pueblos de Cádiz, entre otras muchas protestas²⁰⁷. Si estos hechos habían ocurrido el 7 de febrero, el miércoles 8 tenía lugar una manifestación de más de 3.000 personas en Huelva en solidaridad con los encausados, a la par que se multiplicaban las denuncias por la actitud del Gobierno²⁰⁸. El 10 de febrero, y tras la visita de Marcelino Camacho –que en el tema de las huelgas de hambre tenía una muy larga experiencia– conseguiría, al menos, que los jornaleros

²⁰² Noticia, “Duros enfrentamientos en Madrid entre la policía y 2.000 saguntinos”, *El País*, 10 de febrero de 1984.

²⁰³ Los datos de asistentes proceden de, Noticia, “Trabajadores de Sagunto piden la dimisión del gobernador de Madrid”, *ABC*, 11 de febrero de 1984.

²⁰⁴ Noticia, Manuel Muñoz, “Las saguntinos piden el cese del gobernador civil de Madrid por la actuación de la policía”, *El País*, 11 de febrero de 1984.

²⁰⁵ Noticia, “Aceriales”, *ABC*, 10 de febrero de 1984.

²⁰⁶ Noticia, Víctor Gijón, “Tres heridos en una concentración de trabajadores del sector naval de Santander”, *El País*, 11 de febrero de 1984.

²⁰⁷ Noticia, Alfredo Relaño, “La detención de cinco miembros de CCOO de Huelva origina encierros y manifestaciones”, *El País*, 8 de febrero de 1984.

²⁰⁸ Noticia, Marita Martín, “Manifestación en Huelva y en Sevilla por la libertad de los detenidos”, *El País*, 9 de febrero de 1984.

encerrados en la Catedral de Sevilla depusieran su actitud –no pocos tras haber tenido que ser atendidos con problemas de salud– aunque no por ello dejarían de movilizarse al iniciar diversas marchas por toda Andalucía²⁰⁹.

A mayor movilización, a mayor descontento social, a mayor grado de violencia, más tajante, más imperturbable, más inflexible se mostraba a nivel público el Gobierno y ahora también el PSOE, a través de su Ejecutiva Federal. Tan convencidos del *camino elegido* se presentaban los socialistas que, de hecho, iniciarían una campaña informativa –de corto alcance– en torno a la reconversión industrial al poco tiempo²¹⁰. A la par que echaban “balones fuera”, apuntaban a una gran conspiración de los comunistas para acabar tanto con el Gobierno como con la política de reconversión como venía siendo nota dominante desde el anterior mes.

«Es un proceso –declararía Manuel Chaves como secretario de Política Sindical del PSOE el 10 de febrero– que se va a llevar a cabo para salvar sectores y preservar puestos de trabajo y que genera costes sociales y movilizaciones alimentadas por visiones políticas sectarias».

Por su parte, el principal interesado, Carlos Solchaga, tampoco manifestaría mayores preocupaciones al respecto: “El Gobierno ha cogido el toro por los cuernos, y daba por descontado que iban a producirse crispaciones y roces sindicales”²¹¹. Ahora bien, de puertas para adentro, aquella *contestación social* iba a influir, en breve, en la actitud inmovilista del equipo económico del Gobierno –como parte dominante del Consejo de Ministros con la expreso apoyo del propio Felipe González– en la posibilidad de abrir futuros canales de negociación, ante la evidencia de que el asunto se les podía ir de las manos. Aquí, sin ningún género de dudas, está la explicación del origen del AES.

Ahora bien, las primeras reacciones y respuestas del conjunto de la *familia socialista* vendrían de la mano del Partido y del Sindicato. En esta tesitura, pronto la Ejecutiva de UGT daría finiquitada la dualidad estrategia mantenida en los últimos días de enero y la primera semana de febrero, tras varias reuniones mantenidas con la “Administración”. A saber, por un lado tensar a la organización para negociar convenio por convenio en base a lo aprobado en el último Comité Confederal, a la par que llegar “acuerdos por arriba” con el Gobierno y tratar de reconducir la negociación con la CEOE a través de un “algún acuerdo de referencia”²¹².

No obstante, habrá una etapa de transición clave a lo largo de las dos primeras semanas de febrero. Así la cuestión clave para la CEC de UGT en una primera fase –en concreto en su reunión del 7 de febrero– sería buscar una *salida* al “problema de Aceriales” de cara a evitar que se convirtiera en otro peligroso “precedente en la política sectorial”²¹³. Todos los esfuerzos irían dirigidos en esa misma dirección, pese a reconocerse la situación de “inestabilidad social

²⁰⁹ Noticia, José Aguilar, “Termina la huelga de hambre en la catedral de Sevilla”, *El País*, 11 de febrero de 1984.

²¹⁰ Al respecto en abril desde la Ejecutiva del PSOE se publicaría el siguiente documento, AHFPI, PSOE, “El Gobierno ante la crisis económica. Explicación de la política económica e industrial de los socialistas”, Madrid, abril de 1984, Fc 381. Sobre sus objetivos y contenidos, véase Capítulo 6, *nota* 225, entre otras.

²¹¹ Noticia, “Campaña del PSOE y el Gobierno a favor de la reconversión”, *ABC*, 11 de febrero de 1984. Al día siguiente, el domingo 12, *El País* publicaba un amplio reportaje en donde se aportaban una serie de datos que evidenciaban las enormes dificultades del INI para salir adelante. Noticia, Alberto Valverde, “El INI y sus empresas requerirán de los mercados nacionales y extranjeros 336.000 millones de recursos ajenos en 1984”, *El País*, 12 de febrero de 1984.

²¹² AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 22. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 31 de enero de 1984”, sig. 002251-003.

²¹³ Consúltese el cuadro que presentaría la propia UGT al respecto del Real Decreto-Ley 8/1983: “La reconversión industrial”, *Unión*, nº 46, (1983), pp. 12-13. También por aquellas fechas UGT se vería obligada a sacar un libro con la mayor de las premuras posibles, explicando sobre su posición con respecto a la reconversión industrial: UGT, *Qué es la reconversión industrial*, Madrid, UGT, 1984.

[...] como consecuencia de las medidas aplicadas por la Administración ante el problema de la reconversión industrial”²¹⁴.

Resuelto el *problema de Aceriales* –en lo que, sin duda, sería otra *desagradable* sorpresa ugetista ante la decisión del Ejecutivo tras las negociaciones de diciembre de 1983– un 10 de febrero –e interpretado el mismo como otro pequeño “éxito” de la UGT²¹⁵– se decidirá ya con más firmeza “mantener la filosofía de dar soluciones globales dentro del marco general y por tanto seguir manteniendo el criterio de practicar una política de concertación”, en la siguiente reunión de la Ejecutiva un 14 de febrero. Daba inicio, pues, una progresiva política de desmovilización que se incrementará a lo largo de aquel mes, y para lo cual se buscará el concurso de “Gobierno” y el “Partido” de cara a crear una “Comisión” conjunta que “estudie todos los problemas antes enunciados, con el fin de configurar soluciones globales a los mismos, reconduciendo de esta forma la actuación situación”²¹⁶.

Muy pronto vendrá un conjunto de respuestas y anuncios en esta dirección. De hecho, el mismo día de conocerse el acuerdo en Aceriales, José Luis Corcuera en la sede de APD afirmaría “UGT no le importa firmar en solitario acuerdos de eficacia limitada”²¹⁷. Un anuncio premonitorio. Por lo demás, y pese a acordarse a finales de enero en la misma Ejecutiva ugetista que se trataría de buscar un marco de referencia con la CEOE –contra quien también se lanzarían graves acusaciones de no haber querido llegar a un acuerdo y del auge de la conflictividad– se tendría que salir en plena oleada de conflictos, a negar en público que se hubiera mantenido cualquier reunión con la patronal ante los insistentes rumores. En realidad, se desconocen posibles contactos, al menos, hasta mediados de febrero tras lo sucedido el 18 de enero²¹⁸.

En *público*, por tanto, la UGT se volvería a presentar a lo largo de la segunda quincena de febrero como un *sindicato* que estaba por el diálogo, y que, en todo caso, no renunciaba a

²¹⁴ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 23. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 7 de febrero de 1984”, sig. 002251-003. Así mismo ha de destacarse como en la citada reunión se trataría ya la ‘Modificación Estatuto de los Trabajadores’, aunque nada se recogiera en el acta correspondiente. En realidad –y como ya se ha destacado en más de una ocasión– escasas serían las referencias tanto en las *actas* de la CEC de UGT como en los órganos de expresión de UGT y del PSOE al respecto. Con todo, desde *El Socialista* en el segundo número de marzo, se realizaría una pequeña reseña sobre su trámite parlamentario para afirmar textualmente: «El debate parlamentario fue poco movido a pesar del interés social que ha despertado en la calle y entre los trabajadores y parados. Se puede decir que, a nivel parlamentario, estas dos leyes no han tenido el eco que tuvo en su día la negociación en la ‘mesa de trabajo’ entre sindicatos, Administración y empresarios. Lo importante, sin embargo, es que los trabajadores y sindicalistas tendrán que atenerse a estas nuevas modificaciones para poder conocer sus derechos y deberes». Todo lo anterior para explicar cómo en la *primera vuelta* por el Congreso apenas se había realizado algún ‘cambio’ en los «acuerdos consensuados entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en el pasado mes de noviembre», destinados a flexibilizar la «rígida estructura del mercado de trabajo español». PADILLA, Sol, “El eco de la calle no sonó en el Parlamento”, *El Socialista*, nº 352, (1984), pp. 10-11.

²¹⁵ “No habrá despidos en Aceriales”, *Unión*, nº 47, (1984), pp. 56, en donde también se incluía: “Acuerdo alcanzado en Aceriales por las partes firmantes”. Y asimismo: “Aceriales: éxito y precedente”, *El Socialista*, nº 349, (1984), p. 17. Unas crónicas en donde se podía leer: «Los sindicatos UGT y ELA-STV han preferido el camino de la negociación, más operante, que el de las movilizaciones, mientras los dirigentes de CCOO, siguiendo la inspiración del Partido Comunista, pretendían llevar el conflicto a una situación sin salida».

²¹⁶ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 24. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 14 de febrero de 1984”, sig. 002251-003.

²¹⁷ Noticia, “UGT, dispuesta a suscribir convenios en solitario, según Corcuera”, *El País*, 11 de febrero de 1984.

²¹⁸ “Con ánimo de esclarecer”, *Unión*, nº 46, (1984), p. 6. En cualquier caso, durante la siguiente semana si tendrían contactos al respecto como se puede comprobar en: AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 25. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 21 de febrero de 1984”, sig. 002251-003.

sus puntos de referencia propuestos en el tramo final del AI'84²¹⁹. Mientras que también en *público* se incrementarían los ataques contra los “compañeros de CCOO”, ante su postura *expectante y maximalista*; ya en privado se mantendrían toda una serie de contactos con la “Administración” y el “Partido” de cara a desactivar, paso a paso, la conflictividad.

Como avanzábamos desde el Partido, se empezaría a salir al *paso* de las movilizaciones obreras, con cierta tranquilidad confiando en su fortaleza político-institucional de cara a superar tal etapa. Desde el PSOE se transitaría, en lo básico, por las mismas etapas que UGT. A través de *El Socialista*, entre finales de enero y los primeros días de febrero, se trataría de restar importancia a las movilizaciones. Pese a resaltar logros como la firma del convenio del Metal de Bilbao, no obstante, se reconocería a lo largo de esos mismos días –en concreto en el número 347 de *El Socialista* correspondiente a los días 1 al 7 de febrero, y, por tanto, antes del acuerdo en Aceriales– las tensiones entre el Gobierno y Sindicato ante la reconversión naval –incluidas unas duras declaraciones de Corcuera. Más todavía se llegaría a justificar los motivos de la UGT en su resolución de apoyar la huelga general de Vigo del día 14, ante la obstinación de la patronal, lo que sin duda conduciría a hacer la negociación “especialmente dura y de imprevisibles consecuencias”. Pero, igualmente, se destacaría la confianza en la propia Unión General de Trabajadores en evitar que la cosa fuera a mayores. De esta forma, se presentaría como un ejemplo a seguir la actitud de la Ejecutiva de UGT ante la “retención” de los directivos del astillero Ascon. Tal y como se presentaba en el citado número había sido gracias a “unas intensas negociaciones” de la propia CEC de UGT de cara a disuadir a los trabajadores de tal acción, la que habría permitido su liberalización. Para a continuación dar entrada a unas declaraciones de un “dirigente de UGT”, en donde tras anunciar que seguirían luchando por defender “nuestra posición en contra de la reconversión tal y como se ha empezado a poner en marcha”, mostraría su rotunda negativa a ese tipo de acciones, afirmando: “ese es el trabajo al que ahora hay que dedicarse y evitar provocaciones”²²⁰.

Después de las movilizaciones de la primera semana de febrero –en concreto la del día 2– el asunto empezaría a examinarse con mayor detalle y preocupación en las filas socialistas. En el número 348 de *El Socialista* –de los días 8 al 14 de febrero– se visualizarían los enemigos a combatir. En un durísimo editorial contra la CEOE, se les acusaba –en paralelo y al mismo nivel de CCOO– de estar llevando a cabo una campaña contra la “política económica del Gobierno”. Todo ello a partir de una “estrategia demagógica” de *tintes* políticos destinada a desgastar al Ejecutivo, denunciaba su mínimo “sentido de responsabilidad”. De cualquiera de las formas, el verdadero inductor volvía ser las CCOO. Tras reconocerse el éxito de las “manifestaciones masivas” de los días 2 y 3 de febrero, se llegaría a hablar de las “iras de CCOO” contra “la reconversión industrial, frente a la cual UGT tiene diferentes perspectivas”. Todo parecía claro: se trataba de una *campaña de acoso* al Gobierno. Pues, de hecho, ni siquiera se cuestionarían las movilizaciones llevadas a cabo por la UGT, ante la *irresponsabilidad* de los empresarios, previa afirmación de cómo no se estaba en “contra de la reconversión”²²¹. Pero este complicado equilibrio –entre denunciar una “campaña de acoso” contra el Ejecutivo llevada a cabo por CCOO-CEOE y a la par tratar de justificar las movilizaciones de UGT– llegaría hasta aquí. En adelante, y una vez reconducida la actitud

²¹⁹ Consúltense: “Bases para el diálogo”, *Unión*, nº 47, (1984), pp. 1 y 3-4; y en el mismo número, “Por qué el 8 por 100” (pp. 14-15).

²²⁰ PADILLA, Sol, “Se acelera la negociación convenio a convenio”, *El Socialista*, nº 347, (1984), p. 32. Una crónica en donde también se recogía el siguiente como ilustrativo párrafo: «Las tensiones entre UGT y los ministros de Industria y Economía, Solchaga y Boyer, se han desatado a raíz de la frustración que este sindicato experimentó tras la ruptura de las negociaciones con la CEOE. El propio secretario de acción sindical de UGT, José Luis Corcuera, comentaba, con ironía, el escaso interés que había demostrado Boyer por animar a los empresarios a la firma del acuerdo. A su vez, los dirigentes ugetistas se mostraron incómodos ante la política de reconversión aplicada por el ministro Solchaga, de quien dijeron que ‘no podían pedir su dimisión porque ello significaría ratificarle en su puesto’».

²²¹ Editorial, “Incongruencias empresariales” (p. 7); “Sin embargo, habrá que negociar” (pp. 29-30) ambos publicados en *El Socialista*, nº 348, (1984).

movilizadora ugetista –previa reunión y pacto con el Ejecutivo– tan sólo se centrarían dichas páginas en deslegitimar a las Comisiones Obreras a la par que defender la negociación y la paz social.

La segunda mitad de aquel *movido* mes de febrero se caracterizaría por tres líneas de actuación: por un lado, por el mantenimiento del ritmo de movilizaciones. Un poder movilizador con enormes éxitos pero también con notables fracasos. En todo caso, tanto nuevos sectores como nuevas regiones geográficas se sumarían a esta ola de conflictividad. Por otro lado, se volverían a repetir las escenas de división sindical, principal aunque no únicamente, de la mano de UGT. Pero, ante todo, a lo largo de los días del 13 al 29 de febrero –1984 sería año bisiesto– servirían de termómetro social para medir la creciente alarma social por parte del poder político y mediático, sumada cada vez a una más intensa represión del movimiento obrero, junto con otra considerable campaña de deslegitimación política contra CCOO como venimos destacando.

Calibrar adecuadamente momentos históricos claves dentro de procesos de cambio social, económico y político no resulta para nada sencillo. Los porqués, las causas, los motivos que llevan, en último extremo, a un amplio sector de la población a sumarse de forma masiva a un conflicto, a una manifestación y a una reivindicación común, siempre son difíciles de estimar de forma concreta. Así durante la segunda mitad del aquel mes de febrero se iniciaría con una de las mayores movilizaciones obreras de nuestra contemporaneidad, hasta el punto de que haberse quedado grabado la misma en la memoria colectiva de sus protagonistas anónimos o no.

Nos referimos, a la huelga general convocada en Vigo y su comarca –incluidos otros 16 pueblos– para el 14 de febrero y que concluiría con una paralización total del sector productivo. Un ejemplo, entre otros tantos, de “auténticas huelgas generales regionales”²²². Jornada de lucha que se cerraría con una manifestación de más de 300.000 personas por las calles de El Ferrol²²³. En la citada ocasión, no sólo funcionó la *solidaridad como motor de las movilizaciones*. Con ser importante este factor, dicha jornada de lucha en aquel momento y en aquel lugar se convertiría en la expresión de un gran llamamiento de atención de una región que veía cerrar cada una de sus grandes industrias –vía suspensión de pagos o vía reconversión de cada uno de los sectores implicados– tanto del sector naval, del sector metalgráfico como del sector de bienes de equipo –entre otras empresas implicadas estarían: Ascon, Vulcano, Barreras, CENSA, Fundaciones Mos...– y que también había visto en un solo año incrementarse al doble el paro, pasando del 19% al 33% –en torno a 50.000 trabajadores–²²⁴.

Bajo el lema, “No al desmantelamiento industrial de la comarca” el éxito de aquella movilización también dependió, en parte, de la convocatoria unitaria de CCOO, UGT y la Intersindical Gallega, aunque eso sí con la oposición del alcalde socialista de Vigo, Manuel Soto. Tal sería la repulsa de los trabajadores y de la ciudadanía a la política de reconversión, que en la citada fecha se superarían las cifras de la anterior huelga general convocada un 15 de abril de 1983. Sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos momentos Vigo contaba con una población de 260.000 personas y la asistencia a la manifestación se estimó en más de 300.000 personas en un ambiente de carácter reivindicativo y pacífico. “Para los sindicalistas, la jornada de ayer en Vigo marca un hito histórico del movimiento obrero en Galicia”, concluía un amplio

²²² OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 185.

²²³ Nos remitimos aquí al balance de, OUTES RUSO, José L., *La crisis del sector naval y su repercusión en Galicia* [Santiago de Compostela] Fundación Caixa Galicia, 1990.

²²⁴ Datos extraídos, Noticia, María José Porteiro, “Huelga general para mañana en Vigo y en 16 pueblos contra la reconversión industrial”, *El País*, 13 de febrero de 1984; Noticia, “Huelga general en la comarca de Vigo contra el desmantelamiento industrial”, *ABC*, 14 de febrero de 1984.

reportaje por parte de *El País*²²⁵. Incluso *ABC* que en aquel día se congratulaba de ser “diario más leído por los empresarios” se hacía eco de dicha huelga, incluso elevando la participación a más de 350.000 personas. En su apartado de *Actualidad Gráfica* titularía la noticia, “Vigo, ensayo hacia la huelga general”²²⁶.

Al mismo tiempo, había que sumar nuevos éxitos sindicales-políticos en otras escalas: por ejemplo una notable huelga en el sector de empresas químicas en el sector público el 15 de febrero²²⁷; o la misma convocatoria de importantes movilizaciones y huelgas relacionadas con la negociación colectiva –por ejemplo, en la construcción en Madrid los días 27 de febrero y 2, 6, 7 y 9 de marzo tras una asamblea con la asistencia de 5.000 delegados sindicales en donde se aprobaría tal calendario de movilizaciones²²⁸–. Llegados aquí incluso la propia UGT en solitario convocaba un apretado calendario de movilizaciones en el sector de los transportes durante la primera mitad de marzo–en su última pequeña-gran aportación al conflictivo I Trimestre de 1984– con el objetivo de sumar fuerzas de cara a una huelga general del mismo sector durante la segunda parte del mes de marzo²²⁹. Por lo demás, se solucionarían algunos conflictos laborales tras no pocas movilizaciones y huelgas, en lo que se terminaría por constituir en una de las primeras “victorias parciales” arrancadas al INI y al Ministerio de Economía. Además del citado caso Aceriales, los trabajadores de Potasas de Navarra votarían a favor del cierre de la mina con la garantía de que el INI se comprometiera a crear puestos de trabajo alternativos²³⁰.

Frente a estos avances se producirían *relativos fracasos* en más de una convocatoria. Un aspecto que constituía una considerable novedad, observando el panorama de movilizaciones en su conjunto. En todo caso, el empleo del concepto de “fracaso relativo” es cuando menos matizable en el momento en que en estas líneas tan sólo se están empleando grandes medios de comunicación, en términos generales. Por limitarnos a dos ejemplos: el primer caso, a destacar sería el intento de extensión de la huelga de la comarca de Vigo al resto de Galicia por parte de la Intersindical Gallega –junto con otras organizaciones sindicales y políticas– el mismo 14 de febrero. Criticada por su oportunismo y por su carácter unilateral

²²⁵ Noticia, María José Porteiro, “300.000 personas se manifestaron ayer en Vigo, y la comarca quedó totalmente paralizada por una huelga general”, *El País*, 15 de febrero de 1984.

²²⁶ Noticia, “Vigo y su comarca, paralizados por la huelga contra la reconversión”, *ABC*, 15 de febrero de 1984. Un par de semanas después el diario *El País* publicaba un amplio e interesante reportaje de la transformación del tejido productivo por la que había pasado Vigo y su comarca durante los últimos años: Noticia, Carlos Gómez, “Un barco de punto de irse a pique”, *El País*, 4 de marzo de 1984.

²²⁷ Noticia, “Paro del 80% de los trabajadores en el sector químico, según Comisiones”, *El País*, 16 de febrero de 1984.

²²⁸ Noticia, “Los sindicatos mayoritarios convocan huelga en la construcción”, *El País*, 18 de febrero de 1984.

²²⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT-Transportes convoca movilizaciones a partir del 2 de marzo”, *El País*, 18 de febrero de 1984.

²³⁰ Noticia, Carmelo C. Ridruejo, “Masiva participación en el referéndum sobre el futuro de Potasas de Navarra”, *El País*, 16 de febrero de 1984; Noticia, Carmen C. Ridruejo, “Los trabajadores de Potasas de Navarra aprueban la propuesta del INI”, *El País*, 17 de febrero de 1984; Noticia, “Carmelo C. Ridruejo, “Firmado el acuerdo para el cierre de Potasas de Navarra”, *El País*, 21 de febrero de 1984; Noticia, “Los trabajadores de Potasas de Navarra serán recolocados en la misma zona”, *El País*, 24 de febrero de 1984. Aquel conflicto no finalizaría allí. Durante los siguientes meses y hasta el final de año no faltarían ni el cruce de acusaciones ni las querellas criminales entre empresa y trabajadores y representantes sindicales. E inclusive se iniciaría una política de persecución contra los trabajadores por realizar simples *asambleas informativas*. Noticia, “Potasas de Navarra”, *ABC*, 12 de abril de 1984; Noticia, Carmen C. Ridruejo, “Expedientados cuatro miembros del comité de Potasas de Navarra”, *El País*, 13 de octubre de 1984.

tanto por CCOO como UGT²³¹, sin embargo, tal y como se reconocía en los mismos medios de comunicación, tras grandes como no reales titulares –“La convocatoria de INTG en la Coruña y Lugo tuvo una incidencia limitada”²³²– aquella convocatoria pararía casi por completo la ciudad de Orense –“la acción de piquetes informativos de INTG fue decisiva para lograr paralizar totalmente la ciudad, aunque la huelga no había sido convocada”– aunque con menor repercusión en el resto de las provincias²³³. Más significativo sería el *pinchazo* de CCOO en su convocatoria de un paro general el 17 de febrero en las empresas relacionadas con el holding de Aceriales, cuando días atrás tanto UGT como ELA/STV había firmado un acuerdo con el INI tras la votación de los trabajadores en un referéndum²³⁴. Enfrentada radicalmente a UGT en aquella ocasión²³⁵ y sin el apoyo ni de ELA-STV ni LAB ni HB, las mismas Comisiones Obreras calculaban que aquella convocatoria había afectado al 30% de los trabajadores en Vizcaya y Álava y el 15% de Guipúzcoa; lo que en términos políticos y sindicales era reconocer un fracaso prácticamente sin paliativos, tal y como declararía Tomás Tueros, secretario general de CCOO de Euskadi, quien calificará de “modestos” los resultados obtenidos²³⁶. Un fracaso que sería aprovechado desde el *entorno socialista* para atacar y desacreditar a las Comisiones Obreras a nivel global²³⁷.

Pese a todo era innegable el contexto de movilización en auge. No era infrecuente escuchar en las manifestaciones los cánticos a favor de una *huelga general*. El mismo Marcelino Camacho dejaría caer esa posibilidad un día después de la huelga general en Vigo, con el fin de demostrar el rechazo absoluto a la política económica del Gobierno²³⁸. Una amenaza que no se materializaría ni en aquel momento ni a lo largo de 1984. En esta tesitura, pesaría considerablemente la actitud de abierto enfrentamiento de UGT. Fuera con motivo de un conflicto concreto como en el caso de Aceriales, en donde el mismo José Luis Corcuera acusaría a CCOO de buscar con su huelga general en Euskadi la preparación de una huelga general a nivel estatal con el apoyo de la izquierda abertzale²³⁹; o fuera a través de hechos consumados como sucedería con la firma individual de UGT en el convenio del sector del metal en Madrid²⁴⁰. Una firma que inauguraría, por cierto, una extendida práctica sindical por parte de la central ugetista²⁴¹.

²³¹ Noticia, Manuel Rivas, “Las centrales critican a INTG por convocar un paro en Galicia”, *El País*, 14 de febrero de 1984.

²³² Noticia, Manuel Rivas, “La convocatoria de INTG en La Coruña y Lugo tuvo una incidencia limitada”, *El País*, 15 de febrero de 1984.

²³³ Noticia, María José Porteiro, “300.000 personas se manifestaron ayer en Vigo, y la comarca quedó totalmente paralizada por una huelga general”, *El País*, 15 de febrero de 1984.

²³⁴ Noticia, “CCOO interpreta como un rechazo el acuerdo de Aceriales el 44% de abstención en la votación”, *El País*, 17 de febrero de 1984.

²³⁵ Noticia, Rodolfo Serrano y Patxo Unzueta, “UGT acusa a CCOO de utilizar Aceriales para realizar en Euskadi un ensayo de huelga general para todo el país”, *El País*, 15 de febrero de 1984.

²³⁶ Noticia, Patxo Unzueta, “Escasa incidencia en el País Vasco de la huelga convocada por CCOO por el plan de Aceriales”, *El País*, 18 de febrero de 1984.

²³⁷ Léase el significativo, Editorial, “El fracaso de una huelga estéril”, *El Socialista*, n° 350, (1984), p. 7.

²³⁸ Noticia, Carlos Fuente, “Camacho no descarta la convocatoria de una huelga general en toda España”, *El País*, 16 de febrero de 1984.

²³⁹ Noticia, Rodolfo Serrano y Patxo Unzueta, “UGT acusa a CCOO de utilizar Aceriales para realizar en Euskadi un ensayo de huelga general para todo el país”, *El País*, 15 de febrero de 1984.

²⁴⁰ Noticia, “UGT firma en solitario el convenio del metal de Madrid”, *El País*, 18 de febrero de 1984. En aquel convenio UGT aceptaría un incremento salarial del 7,5%.

²⁴¹ Días después firmaría el convenio de químicas del sector público con un incremento del 8% sobre la masa salarial bruta. Noticia, “UGT firma el convenio de químicas en solitario”, *El País*, 25 de

Pero con o sin unidad sindical por parte de los dos sindicatos más representativos de “clase”, la alarma social, política y mediática empezaba a ser cada vez más perceptible. Aunque todavía faltaba un mes para la famosa intervención en TVE de Felipe González defendiendo a *capa y espada* la reconversión industrial; las declaraciones de los miembros del Ejecutivo empezaban a traslucir cierta flexibilidad a la par que reflexión, en torno a la *velocidad*, que no sobre el *camino* y la *dirección*, de la política económica emprendida. Comenzaba el clásico reparto escenográfico entre el “poli bueno” y el “poli malo” en un intercambio cuando menos singular de papeles. Un día después de conocerse los datos de la encuesta sobre conflictividad de la CEOE –quien cifraba un aumento de la conflictividad en un 46,35% en relación al mes de enero de 1983²⁴²–y frustradas todas las esperanzas de un Acuerdo Interconfederal; en concreto, el viernes 17 de febrero Boyer declaraba en la asociación de empresarios APD su *esperanza* de que “se pueda alcanzar todavía un acuerdo de negociación salarial”, tras anunciar como el “problema de mil novecientos ochenta y cuatro no es la reconversión, sino la salvación de la industria española”²⁴³. Un *mensaje falsamente conciliador* que más allá de asegurarse los aplausos de los empresarios, no dejaba de ser una muestra más de cinismo político en estado puro en un contexto de movilización obrera. En lo que no erraba Boyer, en cualquier caso, era en como la “falta de acuerdo es más cara que la conflictividad”. Así como a la hora de calificar la “situación de sobrecogedora”, por más que se evitarán dramatismos superficiales²⁴⁴.

Que la situación económica y social estaba en un momento sin dirección fija con altas posibilidades de una crisis generalizada, no se le escapaba al propio *El País*, quien celebraba los acuerdos de Aceriales como un elemento de estabilidad dentro del aquel escenario inestable: “De haberse adoptado esa decisión hace escasamente 20 días es más que probable que la oleada de conflictividad social que ha conmovido al País Vasco no hubiera llegado a producirse”. En todo caso, el mismo periódico no dejaba de mostrar su preocupación ante la evidente debilidad del Gobierno, y los sucesivos cambios de planteamientos en relación a la reconversión industrial y, y en concreto, con respecto a la política de suspensión de contratos frente a la recensión de los afectados por la reconversión:

«De confirmarse la hipótesis de que la Administración cedió en sus primeros planteamientos por motivos electorales sería forzoso preguntarse cómo es un posible que un Gobierno socialista se muestre más sensible a la pérdida de votos que a las protestas de centenares de trabajadores en legítima defensa de sus empleos».

Acusación de por medio de la *actitud irresponsable de CCOO y de su alianza con Herri Batasuna*, concluía aquel encendido editorial de la siguiente manera:

«Pero los silencios arrogantes y los cuchicheos officiosos, que componen hoy por hoy el núcleo de la política informativa oficial en este terreno, sólo pueden conseguir que la planta

febrero de 1984. Consúltase también aquí: “Un buen convenio para Químicas”, *Unión*, n° 48, (1984), p. 7.

²⁴² «El pasado mes se han contabilizado 300 huelgas que afectaron a 987.654 trabajadores censados en las empresas implicadas, de los que 462.414 participaron directamente. Las horas perdidas ascendieron a 13.426.122, según un estudio de la CEOE». Noticia, “Conflictividad en enero”, *ABC*, 17 de febrero de 1984. Días más tarde *ABC* completaba aquella información a partir de sus *propias fuentes* que coincidían, casi dato por dato, con las de la patronal. Indicaba así como el número de plantillas afectadas se había incrementado en 301,89%; el de trabajadores implicados en 235,43%; y el de horas de trabajo perdidas en 213,11%. Noticia, Amancio Fernández, “Espectacular aumento de la conflictividad en enero”, *ABC*, 23 de febrero de 1984.

²⁴³ Noticia, “Boyer espera que todavía se pueda alcanzar un acuerdo marco”, *ABC*, 18 de febrero de 1984. A lo que se sumaría en aquel mismo día un editorial del mismo *ABC*, defendiendo al Ministro de Economía tras sus declaraciones en la sede de APD: « ¿Se dirigía sólo a los empresarios? Más bien creemos que este baño de realismo iba dedicado también, y sobre todo, a muchos de sus compañeros de partido y de Gabinete». Editorial, “Dos actitudes”, *ABC*, 18 de febrero de 1984.

²⁴⁴ Noticia, “Boyer espera que todavía se puede alcanzar un acuerdo marco”, *ABC*, 18 de febrero de 1984.

venenosa de los agravios comparativos termine por hacer políticamente inviable que el gobierno socialista [...] emprenda la seguramente inexcusable estrategia de la reconversión industrial»²⁴⁵.

Para cerrar la semana, *ABC*, el periódico que tenía gala el ser el más leído por los empresarios, y él que con tanto ahínco había salido en más de una ocasión en defensa de Miguel Boyer y de su estrategia económica; el domingo 19 abría con una portada en donde se caricaturizaba los lamentos de los socialistas en su idea-fuerza de la herencia recibida. La portada, obra de Mingote y en la que aparecía un conjunto de Homo Sapiens Sapiens en asamblea, incluía un bocadillo en donde se podía leer: “No es que gobernamos mal, es que hemos tenido que asumir la pesada herencia del paleolítico”. El editorial del mismo día estaba dedicado a examinar a la parálisis política del Gobierno frente a la crisis y especialmente a las movilizaciones obreras. Iniciaba el mismo señalando como “[n]ada define mejor al Partido Socialista español que su permanente alusión exculpatoria a la herencia recibida”. Si se elimina toda la carga política peyorativa habitual contra la izquierda en general y el socialismo español en particular, aquel editorial que denunciaba un “estado colectivo de desilusión y de hastío”, ponía el acento en algo consustancial: “Se trata de justificar el no hacer con el hacer precedente”. Añadiendo: “Vemos entonces cómo sobre el telón de fondo de una protesta laboral permanente, los distintos sectores salen a la calle con sus reivindicaciones”. Y con la consiguiente conclusión acerca de la inestabilidad del sistema en su conjunto: “De nuevo la distancia entre la España oficial y la España real crece peligrosamente”²⁴⁶.

En el tramo final de aquel belicoso mes cuando apenas se había cerrado el emblemático conflicto de Aceriales que con tanto entusiasmo celebraría UGT, otros tantos, nuevos o viejos, se abrían, mientras que otros recobraban una inusitada fuerza. Por empezar por el conflicto más incrustado de todos: el de Altos Hornos del Mediterráneo. En este mismo caso, habría cierto intento de recuperación de la iniciativa política del Gobierno, sumado a una fuerte ofensiva por parte del Ministerio de Industria y del INI de cara a cerrar el mismo de una vez por todas. Así el 20 de febrero desde la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo se enviaba al Comité de Empresa de AHM el Expediente de Regulación de Empleo nº 102/84, que afectaba a 155 trabajadores fijos y a 622 trabajadores eventuales. Según Joaquín Almunia, la solución buscada para los trabajadores de Sagunto no sólo superaba las condiciones ofrecidas a los trabajadores de Aceriales, sino que además reconocía como se había retorcido el propio reglamento interno existente. Así indicaba como en el caso de los expedientes de empleo, los primeros afectados serían los trabajadores con menos antigüedad. Era, en palabras del señor Ministro, la “solución menos traumática”, en tanto afectaba a 155 trabajadores que pasarían al fondo de desempleo “en situación de prejubilación, con el 80% de su salario bruto [...] “garantizándoles una jubilación a los 60 años con el 75%, calculado sobre lo que hubiera percibido en activo”. El otro frente de batalla se libraría por parte del INI y giraría en torno al cierre del horno alto número 2, para el cual solamente quedaba 8 días de combustible. Previendo la oposición frontal de los trabajadores se cortaría por lo sano: el cierre del suministro de carbón de coque²⁴⁷.

Al día siguiente, el 21 martes, y como también era previsible para quien hubiese seguido aquel conflicto, los trabajadores desobedecían la orden de parar la producción²⁴⁸. “Desafío al Gobierno”, titularía el jueves 23 *ABC* su noticia sobre Sagunto en su apartado *Actualidad Gráfica*²⁴⁹. Un día antes el corte de los suministros se hacía realidad. José María Lucía, Presidente de la División de Siderurgia del INI lo dejaba bien claro: se estaba ante una

²⁴⁵ Editorial, “Aceriales como pretexto”, *El País*, 18 de febrero de 1984.

²⁴⁶ Editorial, “Herencia e impotencia”, *El País*, 19 de febrero de 1984.

²⁴⁷ Noticia, Manuel Muñoz y Rodolfo Serrano, “La dirección de la siderúrgica, de Sagunto, ordena el inicio de los trabajos para el cierre inmediato del horno alto número 2”, *El País*, 21 de febrero de 1984.

²⁴⁸ Noticia, “Los trabajadores desobedecen en la orden de cierre del horno alto número 2 de Sagunto”, *El País*, 22 de febrero de 1984.

²⁴⁹ Noticia, “Sagunto”, *ABC*, 23 de febrero de 1984.

“situación de indisciplina”, aunque no faltaba la llamada al consenso: “es absolutamente aconsejable que todos los que estamos implicados [...] aportemos las mayores dosis de equilibrio”. Recordando como la decisión del cierre respondía a un proceso de “absoluta racionalidad técnica y económica”²⁵⁰.

Ni el Comité de Empresa ni los trabajadores ni los vecinos de Sagunto se quedarían parados. Antes al contrario continuarían sus movilizaciones, las reuniones y asambleas. Ahora bien, la ofensiva del Gobierno, tras meses de titubeos, parecía definitiva. Así por ejemplo, al día siguiente el mismo José María Lucía informaba que de seguir en funcionamiento los hornos 2 y 3 se produciría un *gran fallo* que pararía toda la cabecera. Difícil encrucijada. Teniendo presente que desde la dirección de la empresa se consideraba el cierre como irreversible, y se acusaba a la “añoranza por una siderurgia que ya estaba pérdida” parte de los males de la industria. No dudando, además, en afirmar como “económicamente es más rentable cerrar de golpe, pero deseamos, que la solución sea lo menos traumática posible”. A partir de ahí, el cierre previsto para octubre de 1985 podría adelantarse varios meses dejando un excedente de 1.800 trabajadores²⁵¹. De esta forma, se llegaría al sábado 25. Fecha a partir de la cual los trabajadores comenzarían la reducción del ritmo de producción, con el fin de evitar el consumo total de las materias primas y ganar tiempo de cara a la negociación. Una negociación en la que los trabajadores iban ahora a remolque. El martes 28 de febrero la dirección entregaba la carta de despidos a 155 trabajadores de 59 y 60 años –ninguno de ellos relacionados con el horno alto número 2–. Una carta con una fecha de despido: el 1 de marzo²⁵². ¿Se estaba ante un nuevo final? No podía descartarse, aunque observando la evolución del conflicto complicado era ofrecer un pronóstico fiable. Todavía más, teniendo en cuenta la innata capacidad del Gobierno de minusvalorar la potencialidad de las movilizaciones obreras.

Lo cierto es que en aquellas alturas cualquier manifestación que no congregara a decenas de miles de personas, cualquier huelga que no parara la producción o cualquier tipo de reivindicación que no consiguiera el apoyo prácticamente total de un sector de producción, parecía que había fracasado. Así estaban las cosas. Por ejemplo, el viernes 24 de febrero, 40.000 personas se manifestaban en Cádiz convocadas por CCOO, CNT y otros sindicatos, junto con varios ayuntamientos contra la reconversión industrial en el sector naval²⁵³. A lo anterior, nuevos focos de malestar laboral se sumaban. La huelga de los días 22 y 23 de febrero de los trabajadores de Iberia y Aviaco también obtendría un considerable seguimiento. Los trabajadores del textil también habían ido a la huelga general durante dos días –miércoles y jueves de la cuarta semana de febrero– reconociéndose su éxito por la propia patronal– y cifrándose en cerca de un 80% el seguimiento, según fuentes sindicales–. No era menor este conflicto, ya que afectada a 400.000 trabajadores en total, con una clara incidencia en Cataluña en donde se situaba 300.000 de los afectados. Un éxito obligaría a la patronal a volver a la mesa del convenio colectivo, que incluía cuestiones como las 40 horas o el periodo del bocado como tiempo efectivo de trabajo²⁵⁴. Sin salirnos de Cataluña aquel mismo miércoles “varios miles de trabajadores de SEAT” se manifestarían convocados por CCOO en solitario –que no

²⁵⁰ Noticia, Manuel Muñoz, “La dirección de Altos Hornos del Mediterráneo corta los suministros a la factoría de Sagunto”, *El País*, 23 de febrero de 1984.

²⁵¹ Noticia, Rodolfo Serrano y Manuel Muñoz, “Si continúa en funcionamiento el horno número 2, se paralizará por sí sola toda la cabecera de AHM”, *El País*, 24 de febrero de 1984.

²⁵² Noticia, Manuel Muñoz, “La dirección de la siderúrgica de Sagunto entrega cartas de despido a 155 trabajadores”, *El País*, 29 de febrero de 1984.

²⁵³ Noticia, “40.000 manifestantes en Cádiz, en contra de la reconversión industrial”, *El País*, 25 de febrero de 1984.

²⁵⁴ Noticia, “La patronal textil vuelve a la mesa negociadora tras la masiva huelga registrada en el sector”, *El País*, 23 de febrero de 1984; Noticia, F. Valls, “Patronal y sindicatos del textil se reúnen hoy tras la huelga de 48 horas en el sector”, *El País*, 23 de febrero de 1984. Y también: “Ruptura por el tiempo del bocado”, *Unión*, n° 48, (1984), p. 7.

UGT mayoritaria en el Comité de Empresa— por un convenio justo²⁵⁵. Precisamente los trabajadores de la SEAT siempre han guardado dentro del imaginario colectivo del movimiento obrero español una especial relevancia²⁵⁶.

Para cerrar el mes los trabajadores de Iberia —ya en solitario una vez que los de Aviaco habían llegado a un acuerdo— convocaban nuevos paros para el 29 de febrero y el 1 de marzo²⁵⁷; mientras que los trabajadores del ferrocarril metropolitano de Madrid convocaban con otro evidente éxito el lunes 27 de febrero una huelga, de cara a la negociación de su convenio colectivo, un hecho que no ocurría desde marzo de 1980²⁵⁸. Todo ello el mismo día de la convocatoria de una huelga en la construcción en Madrid por parte de CCOO y UGT, con una disparidad tremenda de cifras en relación al seguimiento, dependiendo de las fuentes de la patronal o de las estrictamente sindicales²⁵⁹.

Para completar, finalmente, tal cuadro el conflicto del campo de andaluz no decaía aunque se estabilizaba en cuanto a su intensidad. Así por ejemplo, el día 18 de febrero el alcalde Villamartín tras ordenar el desalojo de 12 familias que habían ocupado viviendas de los ayuntamientos inacabadas, para protestar por la situación de desesperación en la que se encontraban los jornaleros, tendría que llamar a la Guardia civil para garantizar su propia protección personal. A lo que se seguía sumando encierros, marchas, huelgas de hambre y todo un conjunto de acciones, que mantenían la tensión conflictiva, mientras que representantes de los sindicatos negociaban las dimensiones económicas del futuro Plan de Empleo Rural con el que se trataba de facilitar el acceso al subsidio de empleo²⁶⁰.

No terminaba aquí la situación de crisis social y política. En un ramalazo indisimulado de amarillismo, *ABC*, a la cabeza, instrumentalizaría la delincuencia callejera, principalmente identificada con los cientos de miles de robos en pequeños comercios, para atacar al Gobierno por la situación creada. “El miedo de los comerciantes”, era la portada de *ABC* el 21 de febrero. “Los comerciantes madrileños tienen miedo”. La causa, la siguiente: “Se siente indefensos ante una oleada brutal de delincuencia política promovida en gran parte por la nueva legislación del ministro Ledesma sobre excarcelaciones y droga que ha supuesto un incremento de más del cien por cien en los atracos en 1983”. Todo lo anterior para anunciar la concentración esa misma tarde de pequeños propietarios en el Palacio de Deportes de Madrid. Este y otros tantos ejemplos inundaría durante aquellos meses e inclusive años, los principales titulares de los medios de derecha en una vertiente política antes que informativa. En cualquier caso, la *delincuencia callejera* mucho tenía más que ver con la situación de crisis y de exclusión social *ad hoc* antes que con cualquier tipo de legislación. En esta situación de crisis generalizada, el 23 mes de febrero se cobraría el asesinato por parte de los enigmáticos Comandos Autónomos Anticapitalistas del senador socialista y parlamentario vasco socialista Enrique Casas. Un asesinato que alcanzaría una enorme resonancia y transcendencia.

No se había atravesado ni la primera mitad de la legislatura y el Gobierno aparecería, en gran medida, ante la sociedad, ante los medios de comunicación y más concretamente ante el

²⁵⁵ Noticia, “Manifestación de trabajadores de SEAT”, *El País*, 21 de febrero de 1984. Véase aquí también lo apuntado en el Capítulo 3, *nota 156*.

²⁵⁶ Véase lo apuntado en Capítulo 7, *nota 24*.

²⁵⁷ Noticia, “Los trabajadores de Iberia mantienen el paro para el 29 de febrero y el 1 de marzo”, *El País*, 26 de febrero de 1984.

²⁵⁸ Noticia, “El «metro» no funcionará desde la madrugada de hoy hasta las 5.45 horas del martes”, *El País*, 27 de febrero de 1984.

²⁵⁹ Noticia, “Discrepancias sobre el alcance de la huelga de la construcción en Madrid”, *El País*, 28 de febrero de 1984.

²⁶⁰ Véase el relato ofrecido en, Noticia, Alfredo Relaño, “Los jornaleros andaluces crean un nuevo foco de tensión en la sierra norte de Cádiz”, *El País*, 19 de febrero de 1984; Noticia, “El plan de empleo rural destinará 43.000 millones a Andalucía y a Extremadura”, *ABC*, 28 de febrero de 1984.

entonces poderoso movimiento obrero, no débil pero sin la falta de autoridad que le había caracterizado los primeros meses. El caso de Sagunto reflejaba ya no a nivel metafórico sino a nivel de la realidad más palpable, la falta de legitimidad real del Ejecutivo. Lo que a su vez mal casaba con la prepotencia y arrogancia que empezaban a ser comunes entre más de un miembro del equipo económico del Gobierno²⁶¹. Fuera o no por la obstinación de mantener el rumbo de la “única política posible” al precio que fuera, por la impertinencia mostrada dentro y fuera de la familia socialista o por el simple convencimiento de que con los 202 diputados se podía hacer y deshacer a su antojo, los socialistas tardarían un tiempo valioso en reaccionar. Una reacción que llegaría demasiado tarde cuando, precisamente, el ciclo conflictivo había alcanzando cotas históricas.

El primer *golpe de autoridad* –como parte de una *1ª fase de reacción*– vendría de la mano del propio Felipe González un 21 de febrero, un día después de reunirse con la Ejecutiva de UGT. Reacción en una doble vertiente: en el de las decisiones y en el de las declaraciones. En el de las decisiones, la decisión estaba tomada: había que terminar como fuera con el problema de Sagunto; en el segundo campo de actuación, el propio Presidente del Gobierno trataría de cobrar el ritmo de la agenda política, con unas declaraciones en donde a la par que mostró su “sensibilidad” por la conflictividad, jugaría, nuevamente, al papel *poli bueno* y al *poli malo*. Todo ello a través de una composición escenográfica que tan brillantemente siempre interpretaba González. “[S]i de algo peca [la política económica socialista] es de no ser lo suficientemente firme para ganar el reto que tenemos planteado”, declararía ante el Grupo Parlamentario Socialista el martes 21 de febrero. No se movería, pues, ni una sola coma de *doctrina oficialista*, en tanto afirmaría como desde el Ejecutivo no pensaba cambiar su política económica. Con todo y como destacaba el mismo ABC tras la dureza mostrada, el Presidente se mostraría “preocupado por el aumento de la conflictividad”²⁶².

Algo más comedido se mostraría, por el contrario, con la UGT con quien, incluso, reconoció públicamente diferencias en el *método* que no con los *finés*. Flexible, en otras palabras, se presentaría a aceptar las tesis de la propia central socialista en relación a la reconversión industrial. De hecho, y como se recogería en las páginas de *El Socialista*, el Gobierno “estaría a punto de reconocer que la fórmula defendida por la UGT [en materia de reconversión] no encarece los excedentes laborales resultantes de la reconversión industrial”. Ello tras una reunión de más de siete horas con la dirección de UGT y el presidente del Gobierno y los ministros de Economía, Industria y Trabajo en una clara muestra de la *necesidad* del Ejecutivo de reforzar la política de alianzas con la central socialista²⁶³. Una reunión de otras tantas que habían tenido lugar en “las últimas semanas”, como se reconocería también las páginas de *El Socialista*²⁶⁴.

En este proceso de desdoblamiento de papeles aquel mismo día en el GPS, González copiando uno por uno los argumentos de UGT –en boca de José Luis Corcuera– acusaría a CCOO de estar preparando una huelga general. Posibilidad que ni el propio Marcelino

²⁶¹ Críticas que no sólo procederían de las fuerzas sindicales y de izquierda, sino también por parte empresarial. José Antonio Segurado, presidente de la CEIM, llegaría a señalar meses después: «Considero que este Gobierno [...] que necesita el apoyo de todo el mundo, está cometiendo un error importante. Y es que alguno de sus miembros, por arrogancia, por ineficiencia o por desconocimiento, no se da cuenta de la situación verdaderamente delicada en la que se encuentra el país». Noticia, “Segurado crítica la arrogancia de algunos ministros”, *El País*, 27 de marzo de 1984.

²⁶² Noticia, “Felipe González, preocupado por el aumento de la conflictividad laboral”, *ABC*, 22 de febrero de 1984.

²⁶³ Noticia, “Felipe González, dispuesto a ceder a las presiones de UGT sobre la reconversión”, *ABC*, 22 de febrero de 1984.

²⁶⁴ “El Gobierno no cambiará su política económica”, *El Socialista*, nº 351, (1984), p. 28. En ese mismo número también se llevaría a cabo un *estado de la cuestión* sobre la intensa conflictividad de las semanas previas, descartando los convenios firmados por UGT, y evitando –lo que si era significativo– mayores críticas a CCOO: PADILLA, Sol, “Sólo el sector metalúrgico avanza” (pp. 31-32).

Camacho había descartado aunque fuera a un nivel más teórico que práctico. Ahora bien, dichas declaraciones tendrían la “virtud” de incrementar todavía con más dureza el ataque contra las Comisiones Obreras. Aunque tiempo habrá de entrar en detalles, en este primer movimiento el propio González no tendría problema alguno en afirmar falsamente –siguiendo aquí también una por una las palabras de Redondo– lo siguiente: “Han convocado tantas huelgas durante el periodo de mando socialista como durante toda la transición, lo que se ha hecho que se pierdan millones de pesetas”. Una declaración que no casaba con los datos, pero que tendría la *virtud* de introducir un potente *ruido informativo* de cara a ganar tiempo en una situación cada vez más descontrolada²⁶⁵. Ni un día tardaría en contestarse al Presidente desde Comisiones Obreras tildándolo, directamente, de mentiroso²⁶⁶.

Después de la reunión de González con la Ejecutiva de la UGT, sumada a su intervención en el GPS, se terminarían las veleidades movilizadoras ugetista así como se marcaría todo un punto de inflexión. Preocupados por el alcance de la “conflictividad laboral” que se estaba “generando”, lo que tocaría, en adelante, sería “reconducir los temas conflictivos” tanto de cara a la negociación colectiva como en relación a la reconversión industrial. Como se analizaría en la reunión de la CEC del día 21 de febrero, después de tal diagnóstico y conjunto de decisiones, sin embargo, no parecía una tarea sencilla –pese a lo hablado y pactado con la Administración– tras verificarse la “imposibilidad de llegar algún acuerdo con la CEOE, de cara a la Negociación Colectiva”, y ante la cerrazón del Ejecutivo en no moverse en el sector público de las directrices aprobadas en los PGE de 1984²⁶⁷. Pese a todo lo anterior, había llegado la hora de poner en marcha la estrategia desmovilizadora, que se centraría, en adelante, en firmar convenios por separado –en no pocos casos por debajo del 6% y del 7%²⁶⁸– frenar las movilizaciones de CCOO y otros sindicatos previa desconvocatoria, sumadas a otras estrategias como examinaremos más adelante. Demasiado lejos se había llegado en una situación se estaba escapando de su posible control²⁶⁹.

²⁶⁵ Noticia, “González acusa a CCOO de estar preparando la huelga general y muestra su inquietud por la conflictividad laboral”, *El País*, 22 de abril de 1984.

²⁶⁶ «Por lo demás, cabe recordarle al señor Presidente, que las principales movilizaciones registradas en el último periodo han sido convocadas unitariamente por los sindicatos más representativos, incluida la UGT, que según datos del propio Ministerio de Trabajo entre los años 1980 a 1982 hubo 4.042 huelgas convocadas frente a 1.677 en 1983, por no remitirnos a la alta conflictividad de los primeros años de la transición». La anterior afirmación procedía de un comunicado del Secretariado Confederal de la C.S. de CCOO, en donde se iría un paso más: «Felipe González reconoce implícitamente en su declaración el fracaso de su política económica es esta y no otra la verdadera [razón] de la amplia contestación social, aunque pretenda encubrirlo con acusaciones a CCOO». Tras descalificar su política económica ‘insolidaria’ y aportar no pocos otros datos, se decía finalmente: «El Secretariado Confederal de CCOO por su parte reitera el llamamiento al Gobierno, para que cambie su actual política económica e inicie sobre nuevas bases, una negociación en profundidad con las fuerzas sindicales y cese en la discriminación en sus relaciones con los sindicatos, arbitrarias y unilaterales, así como la utilización de medidas coactivas para abortar la lucha de los trabajadores». AHT, CCOO-SC, “Comunicado. El presidente del Gobierno encubre el fracaso de su política económica-social con acusaciones a CCOO”, Madrid, 22 de febrero de 1984, sig. 005-021. Noticia, “CCOO interpreta las acusaciones como un acoso al sindicato”, *El País*, 23 de febrero de 1984.

²⁶⁷ Relevante es detenerse en la posición de UGT frente a los diversos conflictos en materia de transportes, con especial referencia al caso de RENFE: «La postura de UGT consiste no tanto en la petición rígida de un incremento salarial del 8 por 100 como en la negociación de planes de viabilidad que garanticen una gestión eficaz de las empresas con participación de los sindicatos». “Quincena conflictiva”, *Unión*, nº 48, (1984), p. 8.

²⁶⁸ A modo de resumen de esta estrategia véase la lista de convenios firmados a finales de febrero así como los incrementos pactados en: “Convenios firmados”, *Unión*, nº 48, (1984), p. 6. Un cuadro bastante similar también se puede observar en el ya comentado reporte de, PADILLA, Sol, “Sólo el sector metalúrgico avanza”, *El Socialista*, nº 351, (1984), pp. 31-32.

²⁶⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 25. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 21 de febrero de 1984”, sig. 002251-003.

Por lo demás, en adelante, de los indicios de la “alarma social” ya se pasaría a la situación de “emergencia política-social” en el entorno periodístico. No casualmente, *El País* al unísono de las declaraciones de González encabezaría durante los días siguientes cada una de las noticias relacionadas con las movilizaciones obreras de la siguiente forma: “Conflictos sociales en varios frentes para el Gobierno socialista”. Un detalle no menor conociendo la afinidad entre el citado medio y el conjunto de la familia socialista. A lo que se añadirían otros detalles como la publicación en menos de cinco días de dos editoriales que no dejaban lugar a dudas del contexto de crisis. “En las últimas semanas se ha producido un grado de conflictividad social que no se registraba desde hace años”, abría así un editorial de *El País*, que bajo el título “El diálogo y el rodillo”, llegaba un día después de las declaraciones del Presidente y que daba, sin rigor ninguno por validas, su falsificación estadística ya citada. Pero lo importante, ciertamente, no estaba ahí pues ya se hablaba sin tapujos de “conflictividad social”. “Han sido estos trabajadores [los afectados por la reconversión industrial], apoyados por los sindicatos mayoritarios, los que han protagonizado los conflictos de mayor crispación”, precisaba. Crispación pero también, ni más ni menos, que “guerra sindical” por parte de CCOO: “Pero es verdad que Comisiones Obreras ha desatado una guerra sindical contra el Gobierno en la calle, ha hecho de Sagunto una piedra de toque de esta estrategia”. En todo caso, para *El País* una vez más parte de la responsabilidad tan sólo competía al Gobierno: “El poder no puede amenazar en vano. No debe amenazar, pero si lo hace, le debilita no cumplir sus amenazas”. En resumen, que ante la “parálisis extraña” el Ejecutivo se veía obligado a establecer un dialogo con los sindicatos representativos de cara a alcanzar un marco social de entendimiento que pusiera fin a tan tamaña conflictividad social²⁷⁰.

El martes 28 se publicaba *El País* su segundo “gran” editorial al respecto de las movilizaciones obreras. La ocasión elegida: la huelga de Metro que comenzaba a recordar a lo que había pasado en el invierno de 1976²⁷¹. Aquí se insistirían, de nuevo, en todos los argumentos tantas veces presentados y sustentados en dos ideas-fuerza: *irresponsabilidad sindical* y *necesidad de mano dura*. Con todo, no evitaba la criticaba a los *abusivos* servicios mínimos impuestos por el Ministerio de Transporte que, en parte, habían conllevado la ampliación y extensión de la propia huelga, y que según el mismo medio justificaba la participación de la propia UGT. Pero dicho esto, no faltaban las *sospechas* siempre bien fundadas: “La sospecha de que Comisiones Obreras sigue plantando al Gobierno socialista desafíos políticos que el Partido Comunista de España (PCE) no puede está más que justificaba ante esta huelga de ayer que se acerca mucho al calificativo de salvaje”²⁷².

Días antes, por su parte *ABC* publicaría su tercera portada en un mes en relación a la conflictividad obrera. El 24 de febrero. “Preocupa la creciente conflictividad laboral”, era el titular. “Imagen de la desolación, ayer, en el aeropuerto de Barajas por la huelga de los trabajadores de Iberia y Aviaco, y que es un botón de muestra de la crecida conflictividad laboral”. Todo ello bajo una imagen impactante de un par de pasajeros durmiendo en un sillón en una terminal del aeropuerto madrileño²⁷³. A lo que seguía el reporte sobre los datos sobre la conflictividad laboral, que presentados como recopilados por *ABC* reproducían miméticamente la encuesta presentada por CEOE días antes.

²⁷⁰ Editorial, “El diálogo y el rodillo”, *El País*, 23 de febrero de 1984.

²⁷¹ Junto al trabajo ya citado de, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delincuentes políticos...*, op.cit., véanse aquí: DÍAZ CARDIEL, Víctor [et al.], *Madrid en huelga: enero 1976*, Madrid, Ayuso, 1976; SANTOS, Félix, ARIJA, José Manuel y CRESPO, Segismundo, *Trabajadores en huelga: Madrid, enero '76*, Madrid, Popular, 1976. Y asimismo, EQUIPO DE ESTUDIO, *La clase obrera, protagonista del cambio*, Madrid, Ediciones Elías Querejeta, 1976.

²⁷² Editorial, “El Metro como víctima”, *El País*, 28 de febrero de 1984.

²⁷³ Portada, “Preocupa la creciente conflictividad laboral”, *ABC*, 23 de febrero de 1984.

Extendida la alarma social, iniciada la primera fase de reacción del Gobierno socialista también en este mes de febrero de 1984, se incrementaría las medidas de presión cuando no represión directa contra el movimiento obrero. *Represión* en múltiples sentidos: la económica, judicial y policial que los jornaleros del campo andaluz ya conocían desde hacía tiempo, y que, en breve, se iba a extender de forma brutal a los trabajadores del Metro de Madrid, a quienes se les había abierto tras la huelga de 27 de febrero más de 1.500 expedientes disciplinarios. No eran los primeros represaliados de aquel ciclo de protestas del mes de febrero. La dirección de Iberia tampoco se quedaría corta días antes: suspensión de empleo y sueldo durante dos días a más de 500 trabajadores por *el delito* de participar en una asamblea sin previa autorización. A lo que se sumarían otros 300 en los siguientes días por “razones” idénticas, junto a también 16 técnicos cesados fulminantes por cuestionar y criticar a la dirección²⁷⁴.

A los pocos días, ya entrado el mes de marzo, el Metro de Madrid se convertiría en el “campo de batalla” en donde el Gobierno, bien acompañado de los medios de comunicación en su lucha contra la “guerra sindical”, iba a tratar de mostrar toda su autoridad. Vía declaraciones altisonantes, vía hechos administrativos –a través de la imposición de servicios mínimos que en la huelga de febrero habían llegado hasta el 80% en horas punta– vía criminalización judicial, pero también vía amenaza de militarización del propio ferrocarril, lo que recordaba, por cierto, la actuación del Gobierno presidido por Arias Navarro. Justamente, sobre este último pivote, el mantenimiento del *orden público* vía policial, el Gobierno se venía apoyando con cada vez más frecuencia de cara a frenar la oleada de movilizaciones obreras. Una vía de contención duramente aplicada y que en ese mismo año se llevaría por delante la vida de varios trabajadores. Aquí también se repetía la historia de la transición a la democracia. Había llegado, en suma, la hora de la reacción en todos y cada uno de los frentes, aunque el precio a pagar pudiera llegar a resultar elevado.

Se cerraba así uno de los meses más conflictivos de nuestra contemporaneidad en tiempos democráticos. Y lo hacía con otra de las señas comunes de aquel tiempo preciso: la división sindical. “La situación de CCOO puede llegar a ser irreversible, y sus posturas le pueden llevar a alinearse con grupos minoritarios y radicalizados”, declararía a *El País* Nicolás Redondo por aquellas fechas²⁷⁵. Incluso el siempre *comedido* Rodolfo Serrano apuntaba en una de sus crónicas laborales lo siguiente tras la ya citada reunión entre UGT y el Gobierno:

«Aunque fuentes de UGT desmintieron que esta central hubiera adoptado compromiso alguno, en determinados medios se ha subrayado la ‘coincidencia’ en las desconvocatorias de las huelgas de autobuses y metro de Madrid, justamente tras esta reunión. No parece impensable, según estas fuentes, que se produzca una oleada de desconvocatoria de movilizaciones que deje a CCOO como única responsable de las acciones de presión»²⁷⁶.

11.2.5. El Gobierno reacciona. Deslegitimación y represión contra el movimiento obrero: de la «alarma social» a la situación de «emergencia político-social» (marzo 1984)

«Pero acontece que, además de las funciones tradicionales de las grandes organizaciones sindicales, funciones que siguen necesitándose tanto como en épocas pasadas, el funcionamiento de la economía en las sociedades modernas es impensable sin la participación de los sindicatos. Cuanto más representativos, y más fuertes, en consecuencia, más eficaz será su participación y más beneficiosa su colaboración para el desarrollo de la economía del país».

²⁷⁴ Noticia, “Sancionados 800 trabajadores de Iberia por participar en una asamblea no autorizada”, *El país*, 17 de febrero de 1984.

²⁷⁵ Entrevista a Nicolás Redondo realizada por Rodolfo Serrano, *El País*, 19 de febrero de 1984.

²⁷⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT no quiere asumir ningún compromiso con el Gobierno hasta que los hechos, no refrenden el espíritu de negociación”, *El País*, 23 de febrero de 1984.

Editorial, “El Sindicato: base de la sociedad moderna”, *El Socialista*, nº 352, (1984, 7 al 13 de marzo)²⁷⁷.

Las dimensiones históricas que había alcanzando la conflictividad obrera hasta febrero de 1984, no se escaparían al escrutinio de uno de los más lúcidos intelectuales de nuestra contemporaneidad: Manuel Vázquez Montalbán. En un artículo publicado en *El País* con el significativo título de, “El Gobierno no tiene quien le escriba”, iniciaba el mismo apuntado: “El Gobierno temía el sesgo bisiesto de febrero y sumaba con los dedos los conflictos previstos”. Al mismo tiempo, “ha fracasado en la movilización de intermediarios capaces de lograr [un] difícil consenso, no ha dispuesto de un equipo capaz de apologetas directos e indirectos de su gestión”. Por la derecha, por la izquierda llegaban presiones de todo tipo, según el mismo Vázquez Montalbán, a la par que: “[m]enos mal que, de momento, los llamados poderes fácticos no echan demasiada leña al fuego, cada cual con su prudencia, su miedo”.

Una suma de conflictos que estaba resquebrajando a la familia socialista. Por un lado, el PSOE parecía desbordado al tener que haber asumido la “doble función de partido de gobierno y de partido activista en el tejido social, en ese terreno donde se debía dar una batalla vulgarizadora casi cotidiana”; pero, por otro lado, destacaba, con acierto, lo que calificaba como la *función suicida* de UGT: “UGT ha hecho todo lo que ha podido y ha llegado incluso al borde del suicidio tratando de combinar la función pedagógica con la función reivindicativa, de la que no puede prescindir si no quiere perder la guerra por la hegemonía que le enfrenta a Comisiones Obreras”.

Pero este oscuro panorama no termina ahí. Dado casi por seguro como el “encantamiento [del 82] no puede dudar, no va a durar”. Ahora bien, el problema real era que frente al PSOE no había alternativa por la izquierda o de carácter progresista: “Ningún sector de la conciencia progresista de España puede hacerse la ilusión de que el caos repercutiría en su provecho”. Sin duda, está aquí otra de las poderosas razones de que el principal oponente tanto en el terreno social como político de los socialistas, Comisiones Obreras, finalmente no diera el gran paso: una huelga general, que a tenor de la situación dada, podía tener resultados imprevisibles²⁷⁸.

En gran medida marzo de 1984 se convertiría en el principio del final de la fase alta del ciclo conflictivo. Esto no significativa ni mucho menos que en los siguientes meses, de inmediato, desapareciera la tremenda actividad huelguística. Marzo, de hecho, es un mes cargado de tensiones sociales, de alarma por la situación de descontrol en el campo andaluz así como en otros sectores y regiones. No obstante, también es cierto que la intensidad disminuye por múltiples razones que iremos exponiendo. Entre otros, estaría el cierre de algunos conflictos, principalmente, vía convenios colectivos como sucedería en el importante caso de la Banca, que una vez más, y como había sucedido previamente, marcaría buena parte de la dinámica de la conflictividad. A lo que se añade la profundización del enfrentamiento sindical, en donde se van “quemando” los escasos puentes de entendimiento entre los principales sindicatos representativos. Pero con todo, no pasaba día en que la prensa diera a conocer cinco o más huelgas, movilizaciones, encierros, choques con la policía. Aunque estos mismos medios de forma no casual, silenciarán no pocas movilizaciones y actuaciones del movimiento obrero en una cada vez más palpable línea de bloqueo informativo. En todo caso, es también en este mismo mes en donde, al menos, se pierde el impulso necesario –basado en las famosas condiciones objetivas y subjetivas– para convocar una huelga general. O mejor dicho, para una generalización de la conflictividad que hubiera puesto en peligro la propia estabilidad política.

En esta modificación de las *condiciones objetivas y subjetivas* mucho tendría que ver la *2ª fase de reacción* del Gobierno socialista tras la protagonizada el mes anterior. En un triple frente –político, jurídico, policial-militar– desataría una auténtica campaña –con la

²⁷⁷ Editorial, “El sindicato: base de la sociedad moderna”, *El Socialista*, nº 352, (1984), p. 7.

²⁷⁸ VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, “El Gobierno no tiene quien le escriba”, *El País*, 9 de marzo de 1984.

colaboración en modo *función suicida* del PSOE, bien acompañado de la “quemada” UGT– de cara a recuperar el ritmo de la agenda política y mantener el control en la calle, en los centros de trabajo. A nivel político, se produciría un acontecimiento histórico tan singular como único: la intervención televisada por TVE del propio Presidente del Gobierno explicando los parabienes de la reconversión industrial. Aquí no se trataba tanto ya de recuperar la legitimidad política perdida en los meses anteriores, ni de marcar los ritmos propios, sino de generar una política informativa –o dicho con otras palabras una narración propia– en torno a las bondades de la “única política posible”²⁷⁹. A nivel jurídico, no sólo se continuaría con los ambiciosos proyectos legislativos a través del BOE, sino que también se emplearía esta misma vía de cara a la represión laboral. Una represión que cada vez tendría un carácter más policial e inclusive militar, ganando fuerza hasta el trágico final del año 1984. Pero, ¿hasta qué punto fue efectiva la segunda fase de reacción en la disminución de la conflictividad?

Igualmente en este mes de marzo ya se pueden visualizar los efectos más visibles de las movilizaciones. Causas-efectos en tres direcciones: reforzamiento de la capacidad de negociación empresa por empresa, aunque no tanto a nivel global; incremento de las “victorias parciales”, pero con la constatación de la no variación de la política económica del Gobierno; y ante todo, si un aspecto *positivo* tendría el ciclo conflicto viendo la marcha del año anterior, sería evitar retrocesos mayores en cuestiones salariales y derechos laborales conquistados.

Pero no sólo, pues como venimos insistiendo este ciclo conflictivo tendría la virtud de frenar, en no poca medida, las iniciativas de los sectores económicos más duros del Consejo de Ministros, y, en paralelo, abrir discrepancias dentro de la *cúpula* del Partido. La apertura de vías para retomar lo que ahora se denomina el *diálogo social*, también encuentra aquí su razón de ser en este mes de marzo. Como encuentra también su razón de ser la imposición de ciertos límites –visibles y no visibles– a lo que ya se conocía como el *rodillo socialista*.

Pero en esta atenuación del ritmo de la estrategia de modernización socialista, asimismo pesarías otros focos de tensión social. Más allá del terrorismo de Estado en primer lugar –vía los GAL– o de la lacra del terrorismo de ETA o de los GRAPO, no pararían de crecer los focos de alarma social: por ejemplo, las masivas como exitosas movilizaciones del profesorado de enseñanza secundaria²⁸⁰; por otro lado, las más que considerables movilizaciones en contra de la LODE por parte de los sectores más conservadores e integristas católicos, que seguían conservando su poder intacto, a pesar de que la visualización de su conflicto en esta ocasión no evitarían que la citada Ley de Educación saliera adelante. Dentro del que era considerado por la ciudadanía uno de los principales problemas, a saber la permanente situación de inseguridad –en un tono cada vez más violento– lo que a su vez estaba llevando a notables movilizaciones²⁸¹, se añadiría un nuevo elemento: el secuestro de

²⁷⁹ Una denuncia que desde principios de febrero no faltaría en todos y cada uno de los editoriales económicos de *El País* y por descontado de *ABC*. Así en un editorial de *El País* titulado “El rumbo de nuestra economía” y publicado un 13 de febrero, tras repasar las principales variables macroeconómicas se criticaba lo siguiente: «A este respecto, cada vez se echa más en falta una clara exposición por el Gobierno de la situación real en la que se halla la economía española y de la política a seguir durante los próximos años [...]. La demanda de sacrificios y las exhortaciones a la solidaridad deberían estar precedidas de una exposición suficiente de los motivos que obligan a ese esfuerzo [...]. Es probable que las serias resistencias sociales ante los intentos de aplicar coercitivamente y sin explicaciones una política de austeridad pudieran debilitarse, o transformarse incluso en forma de apoyo, si el Gobierno pidiera en vez de exigir, hablara en vez de callar, negociar en vez de imponer y enmarcara los sacrificios solicitados dentro de un proyecto político de transformación en vez de considerarlos como meros ajustes de ingeniería social, requeridos por la coherencia de los cuadros macroeconómicos». Editorial, “El rumbo de nuestra economía”, *El País*, 13 de febrero de 1984.

²⁸⁰ Noticia, “80.000 profesores de centros estatales secundaron la huelga, según los sindicatos”, *El País*, 1 de marzo de 1984.

²⁸¹ Para empezar el mes de marzo, el jueves 2 *ABC* anunciaba en su portada: “Barcelona cerrada”. Se repetía así el cierre de comercios, junto con diversas concentraciones que le solían acompañar, y que tenían por precedente más cercano en las movilizaciones de Madrid el 21 de febrero. Movilizaciones, por

empresarios con fines exclusivamente económicos. Lo que el propio *El País* denominaría como “la industria del secuestro”²⁸² con una contabilización de unos 17 casos, aunque no dudaba en afirmar que hubieran podido darse otros tantos casos fracasados o directamente resueltos sin mayor publicidad. Una *industria* que no dudaba en relacionarla con la crisis económica. Un tema, por cierto, tratado con no pocas dosis de populismo por parte de la entonces considerada prensa seria²⁸³, que venía a sumarse a la campaña de instrumentalización por parte de la derecha al respecto²⁸⁴.

Sin duda aquellos eran tiempos difíciles para el pequeño y medio empresario cuando incluso llegaban a la misma Agencia Tributaria peticiones para desgravar el coste de los secuestros o directamente del impuesto revolucionario²⁸⁵. Prácticamente no pasaba día en que no se conociera noticia al respecto²⁸⁶. Todo ello con la innegable sensación política de un

cierto, que se iban a extender a otras importantes ciudades con notables éxitos. Incluso en esta ocasión *El País* llevaría al asunto a su apartado editorial: «Si se trataba de sensibilizar a los poderes públicos [...] respecto del descontento por la inseguridad ciudadana y las dificultades de las instancias policiales y judiciales para hacer frente a esta amenaza, la convocatoria ha logrado sus objetivos». En todo caso, a este mismo medio de comunicación no se le escapaba la cercanía de las próximas elecciones a la Generalitat: «No faltarán, sin embargo, a quienes consideren el cierre de comercios, cuando están a punto de convocarse elecciones autonómicas, es una maniobra de desgaste contra los socialistas». Editorial, “El cierre de los comercios”, *El País*, 2 de marzo de 1984. Ahora bien, incluso desde este mismo periódico no se dudaría en pedir *mano dura* y más y mejores efectivos policiales. Así días después y tras los «dos últimos atracos con homicidio cometidos en Madrid han sido, perpetrados con todas las dosis de brutalidad que comparta la criminalidad primitiva», se daba por clausurado el tiempo de la inanición. Fin de los eufemismos, para acusar, *sin medias tintas*, al Ministro del Interior de la «desmoralización de los cuerpos de seguridad» y de cómo el «orden público se ha deteriorado fundamental porque se ha deteriorado antes la dirección de la acción policial». Con mensaje final incluido: «Y esto se advierte en múltiples manifestaciones: desde el aluvión de escuchas telefónicas incontroladas ante la detención – ¿qué decir de la utilización por el Gobierno socialista del eufemismo *retención*?– del dirigente comunista Enrique Curiel por sus ‘antecedentes policiales’. ¿Esperará Felipe González a que se le detenga –o le retengan– sus propios subordinados por sus antecedentes policiales anteriores a 1975 o se decidirá a poner orden en su propia casa para que mejore también el orden en la calle?». Editorial, “El Ministro del Interior”, *El País*, 21 de marzo de 1984.

²⁸² El domingo 11 de marzo publicaba un amplio reportaje al respecto: Reportaje, Ismael Fuente, “Secuestros, una nueva modalidad de delincuencia común”, *El País*, 11 de marzo de 1984. Acompañado de un contundente Editorial, “La industria del secuestro”, *El País*, 11 de marzo de 1984. Un fenómeno que se calificaba de la siguiente forma: «una alarmante realidad y un síntoma preocupante»

²⁸³ «La crisis económica, el desempleo masivo y el sombrío horizonte que para las nuevas generaciones significa el paro juvenil se encuentra en el trasfondo de ese crecimiento general de la delincuencia que el retraso técnico y las luchas intestinas de los cuerpos encargados de la seguridad ciudadana no logran contrarrestar con la eficacia deseable». Editorial, “La industria del secuestro”, *El País*, 11 de marzo de 1984.

²⁸⁴ Un ejemplo de otros tantos sin salirnos del mismo mes de marzo: “Un atraco cada veinte minutos en España”, así rezaba la portada de *ABC* del 28 de marzo que bajo la fotografía de un atraco a una sucursal bancaria, acompañaba la misma con el siguiente inquietante texto: «La inseguridad ciudadana alcanza ya cotas insostenibles y de verdadera preocupación nacional [...]. Pero son quizá los empresarios, los pequeños y medianos comerciantes, los que sufren los mayores y más directos zarpazos de esta lacra social, consecuencia directa de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que excarceló a centenares de malhechores». Portada, “Un atraco cada veinte minutos”, *ABC*, 28 de marzo de 1984.

²⁸⁵ Noticia, Carlos Gómez, “Los gastos por secuestro no son deducibles de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas”, *El País*, 30 de marzo de 1984. Véase, igualmente, Noticia, “La CEOE propone nuevas medidas de seguridad al ministerio del Interior”, *El País*, 9 de marzo de 1984.

²⁸⁶ Por ejemplo, para tan sólo los diez primeros días de marzo se conocerían no pocos casos de secuestros: Noticia, “La policía investiga el posible secuestro del industrial barcelonés Raimundo Gutiérrez”, *El País*, 1 de marzo de 1984; Noticia, “Secuestrado dos empresarios, uno en Toledo y otro en

Gobierno a remolque e incapaz de adelantarse a los hechos y cuya respuesta llegaba tarde y mal, sin coordinación entre Justicia e Interior, y mediatizada, en gran medida, por la campaña de los grupos de poder más derechistas y populistas²⁸⁷.

Lo impensable, lo inimaginable también cobraba visos de realidad en aquellos accidentados meses. Mientras que la conflictividad laboral se extendía por agua, tierra y aire durante el mes de marzo, el mismo quedaría marcado para la posterioridad por el ametrallamiento de una patrullera de la armada francesa al pesquero de bandera española Valle de Atxondo un 7 de marzo de 1984²⁸⁸. Todo ello en aguas comunitarias controladas por Francia en el Golfo de Vizcaya. El resultado más directo 9 pescadores heridos dos de ellos de gravedad; el resultado más indirecto una ola de indignación y de rebrote del espíritu nacionalista español, que reforzaría el imaginario colectivo social un odio anti-francés con resonancias históricas. Pero a su vez cargado de una memoria social viva vinculada a las habituales imágenes que se sucedían en la frontera entre ambos países por el destrozo de cientos de toneladas de frutas “nacionales” –*fresas españolas* para más señas–. El conflicto político entre “compañeros socialistas” –en pleno debate de la política comunitaria de agricultura y pesca– estaba servido en un contexto extremadamente *caliente*.

Pero más allá de que lo impensable se transformara en principio de realidad, los conflictos obreros no dejarían de sucederse durante la primera mitad del mes de marzo. Nuevos focos aparecían cuando ni siquiera se habían cerrado los conflictos más candentes. Algunos de los que mayor proyección tendrían durante lo que quedaba de año comenzaban su andadura siguiendo ya un esquema habitual: la presentación por parte de la empresa de un plan de reducción de gastos extremo cuando no se anunciaba el cierre. Nos referimos, en este caso, al plan presupuestario presentado por la dirección Hunosa a los más de 22.000 trabajadores y en donde directamente se hablaba de congelación salarial de “tres puntos por debajo del IPC para los dos años siguientes”²⁸⁹. Se iniciaba así las primeras movilizaciones “espontaneas” que con el tiempo iba a generalizarse y radicalizarse fuera del ámbito de actuación de los sindicatos mayoritarios²⁹⁰. Igualmente otros conflictos estallarían de lleno en aquellos primeros días: por ejemplo, la huelga general convocada conjuntamente por CCOO y UGT los días 29 de febrero y el 1 de marzo en toda la provincia de León, motivada por la marcha de la negociación colectiva²⁹¹. Pero a su vez otras tantas movilizaciones obreras arrancaban sus reivindicaciones en la inauguración del tercer mes del año: desde los trabajadores de Telefónica²⁹², pasando por lo de Transmediterránea, Construcciones Aeronáuticas, los contratados temporales de la

Cáceres”, *El País*, 4 de marzo de 1984; Noticia, “La investigación apunta el robo con móvil de la muerte de un empresario en Valladolid”, *El País*, 8 de marzo de 1984.

²⁸⁷ Noticia, Rafael Nadal, “Fernando Ledesma anuncia que será retocada nuevamente la ley de Enjuiciamiento Criminal”, *El País*, 2 de marzo de 1984; Noticia, “El Gobierno, decidido a frenar la escalada de inseguridad ciudadana”, *El País*, 20 de marzo de 1984.

²⁸⁸ Noticia, José Luis Barbería, “Nueve pescadores españoles, heridos por los disparos de una patrullera francesa”, *El País*, 8 de marzo de 1984. Un mes después tendría un suceso de similares características, aunque en aquella ocasión con Portugal: Noticia, “Los pesqueros apresados tendrán que pagar una multa de 600.000 pesetas”, *ABC*, 17 de abril de 1984.

²⁸⁹ Noticia, “Plan de tres años en Hunosa”, *El País*, 7 de marzo de 1984.

²⁹⁰ Noticia, “Hunosa”, *ABC*, 10 de marzo de 1984.

²⁹¹ Noticia, Gonzalo Rodríguez, “Primera jornada de huelga general en la provincia de León”, *El País*, 1 de marzo de 1984; Noticia, Gonzalo Rodríguez, “La actividad comercial quedó ayer paralizada en la ciudad de León”, *El País*, 2 de marzo de 1984.

²⁹² Noticia, “Los trabajadores de Telefónica realizan hoy un paro de dos horas”, *El País*, 8 de marzo de 1984.

Seguridad Social... o los propios transportistas de Guipúzcoa, quienes llegarían en momentos concretos dejar sin prácticamente combustible a la provincia vasca²⁹³.

Un posible estado de la cuestión para aquellas fechas si bien indicaba que el número de conflictos en marcha había descendido ligeramente en términos numéricos en relación al anterior mes, no sería así en intensidad. De forma generalizada en todos y cada uno de los casos, se asistiría a un endurecimiento de las posiciones entre las partes, especialmente los que duraban semanas. Por ejemplo, conflictos ya antiguos derivados de la negociación colectiva, como en el caso de RENFE o en la construcción en Madrid. Extendido este último a otras provincias ante las duras posiciones de la patronal²⁹⁴. Así en el caso del ferrocarril el progresivo endurecimiento se produciría tanto en la mesa de negociación como a través del BOE al fijar los servicios mínimos ante las futuras convocatorias. Una herramienta que no frenaría las diversas convocatorias²⁹⁵.

En verdad, no dejaban de sumarse *éxitos* –parciales, en la mayor parte de los casos– en el haber del movimiento obrero. Inclusive conflictos días antes silenciados por la prensa aparecían en los primeros días de marzo destacados en las diferentes secciones de economía y laboral en los medios. Por ejemplo el 9 de marzo se podía leer: “La conflictividad laboral tuvo especial incidencia ayer en la Compañía Telefónica Nacional de España, el sector textil, construcción de cuatro provincias, madera y corcho de Madrid y Hunosa”²⁹⁶. Pero no todas serían malas noticias para el Gobierno y la patronal. Viejos conflictos con alta incidencia a nivel público, en donde desde la dirección de la empresa se había empleado de forma tajante en la represión contra sus trabajadores por ejercer sus derechos democráticos, llegaban rápidamente a acuerdos. Este sería el caso de Iberia. Tras la contundente huelga del día 1 de marzo²⁹⁷, y una brutal campaña periodística de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, inmediatamente después de los sucesos del Metro²⁹⁸, la campaña movería ficha proponiendo un 4,5% de media de subida salarial²⁹⁹. Y cuando el acuerdo parecía complicado en una compañía en pleno proceso de reconversión –y una de las más endeudas junto con RENFE³⁰⁰– UGT rompería la *unidad de acción*, y junto con el sindicato independiente SITA –de cara a garantizarse la representatividad necesaria para validar la firma del convenio– aceptaría una subida del 5,5%. Un punto por debajo de su posición en este convenio y dos coma cinco puntos por debajo de su propio marco para la negociación de aquel año. A lo que se sumaba otras

²⁹³ Noticia, “Falta de combustible en Guipúzcoa por la huelga del transporte”, *El País*, 11 de marzo de 1984.

²⁹⁴ El día 6, 7 y 8 de marzo se desarrollarían exitosas huelgas en el sector de la construcción y de la madera y el corcho en la región de Madrid, ante la postura de la patronal de ofrecer tan sólo el 5% de subida salarial. Noticia, “Huelga en la construcción y madera y corcho de Madrid”, *El País*, 7 de marzo de 1984.

²⁹⁵ Noticia, “9.500 trabajadores de Renfe, afectados por el plan de servicios mínimos en la huelga de hoy”, *El País*, 6 de marzo de 1984; Noticia, “Sin incidentes en la jornada de paro de los trabajadores de Renfe”, *El País*, 7 de marzo de 1984; Noticia, “La huelga de Renfe fue secundada ayer por la práctica totalidad de la plantilla”, *El País*, 10 de marzo de 1984.

²⁹⁶ Noticia, “Huelga en Renfe y desconvocado el paro en Iberia, Metro y Gas Madrid”, *El País*, 9 de marzo de 1984.

²⁹⁷ Noticia, “Los empleados de tierra de Iberia secundan la huelga”, *El País*, 2 de marzo de 1984.

²⁹⁸ Qué mejor ejemplo que citar, Editorial, “Las alas de Iberia”, *El País*, 3 de marzo de 1984.

²⁹⁹ Noticia, “La dirección de Iberia presenta una nueva oferta, con un 4,5% de subida salarial”, *El País*, 7 de marzo de 1984.

³⁰⁰ Noticia, Carlos de Miguel, “Iberia: 90.000 millones del INI para su refluotación”, *ABC*, 7 de marzo de 1984.

cesiones en materia de derechos laborales y reducciones de plantilla³⁰¹. Como decíamos no era una mala noticia. Si bien se cerraba un conflicto laboral con una enorme repercusión, no sólo se había conseguido un *convenio colectivo* a la baja, tras el expediente disciplinario a centenares de trabajo, sino que la unidad entre los sindicatos mayoritarios se había roto.

Pero el caso *Iberia* en aquel preciso instante, en la práctica, era un *espejismo* sin mayores resonancias públicas, a excepción quizás de SEAT, gracias nuevamente a la firma en solitario de la central socialista de otro *convenio colectivo a la baja*. Y es que, a la par que las posiciones patronales se endurecían y la represión en sus más diversas esferas se recrudecía, las huelgas se incrementaban con mayor capacidad de movilización dentro de la espiral –ya anunciada– de acción-represión-acción. Todo ello con una nota común, el cada vez más empleado recurso a la violencia física por parte de los cuerpos de orden público. Dos ejemplos pueden valer para los diez primeros días de marzo:

«Dos trabajadores de Pedro Orbeagoz resultaron ayer heridos cuando efectivos de la Guardia Civil interrumpieron las votaciones que realizaba la plantilla de la empresa para determinar si apoyaba el acuerdo suscrito entre la dirección de Aceriales y las centrales UGT y ELA-STV»³⁰².

Si el caso ya anterior por sí resulta indicativo del incremento de la presión policial por todos los medios, días antes se produciría la denuncia de los sindicatos con respecto a la “actuación” de los cuerpos de seguridad en relación a la huelga de textil. Una *intervención* que recordaba tiempos no muy lejanos. Tras la huelga del 29 de febrero en dicho sector con un considerable seguimiento³⁰³, en la segunda jornada de movilizaciones al día siguiente se podía leer en la empresa la siguiente descripción: “La policía ha obligado a grupos de huelguistas de Igualada (Barcelona) a reintegrarse a las tareas productivas, en algunos casos acompañándoles del brazo hasta su puesto de trabajo”, según explicaba el secretario de CCOO del Textil, Agustí Prats. A lo que se sumaba la denuncia de detenciones de piquetes o de solicitud de documentación a huelguistas³⁰⁴. Una represión que no frenó la convocatoria de nuevas protestas los días 7 y 8 de marzo, de cara a reivindicar el mantenimiento del poder adquisitivo y el tiempo del bocadillo. Movilizaciones que, de nuevo, se encargaría de reprimir la policía previa orden de Delegación de Gobierno³⁰⁵.

Una mayor represión policial que no ocultaba a esas alturas la extendida y la reconocida *preocupación oficial* en conflictos como los protagonizados por los jornaleros de Andalucía. “La tensión social en Andalucía comienza a preocupar a las autoridades”, titulaba un detallado reportaje de Alfredo Relaño publicado en *El País*, el 5 de marzo de 1984. Tras explicar las dificultades del nuevo plan de empleo comunitario, junto con las esperanzas depositadas en la nueva Ley de Reforma Agraria tras la llegada de José Rodríguez de la Borbolla a la presidencia de la Junta de Andalucía. “De forma casi diaria hay un par de ocupaciones, fincas, encierros, marchas o cortes de carreteras”, se decía en la entrada de la noticia, para afirmar a continuación: “El clima de tensión sostenida comienza a preocupar a las autoridades”. Lo cierto, es que en aquellas fechas éste y otros artículos resumaban contradicciones por doquier, básicamente reflejadas en lo siguiente: el relato de una conflictividad real, cotidiana y la presunta ausencia de cualquier *efecto* político de tales movilizaciones, a través de una lectura cuanto menos digna a tener en cuenta en lo relativo a

³⁰¹ Noticia, “UGT y SITA aceptan un aumento salarial del 5,5% en Iberia”, *El País*, 9 de marzo de 1984.

³⁰² Noticia, “Heridos dos trabajadores de Pedro Orbeagoz”, *El País*, 9 de marzo de 1984.

³⁰³ Noticia, F. Valls, “La huelga del textil fue seguida por el 85% de los trabajadores, según CCOO y UGT”, *El País*, 1 de marzo de 1984.

³⁰⁴ Noticia, F. Valls, “La policía obligó ayer a trabajar a huelguistas del textil, según CCOO”, *El País*, 2 de marzo de 1984.

³⁰⁵ Noticia, “Los trabajadores del textil iniciaron ayer un paro de 48 horas”, *El País*, 8 de marzo de 1984.

una interesada deformación de la propia realidad. Así pues, tras la glosa de las divisiones entre el SOC y CCOO³⁰⁶, después de retratar los problemas de supervivencia de no pocos jornaleros, se hablaría de “guerrilla social permanente” y de que “hay demasiada gente jugando con fuego”. Y ello con una evidente intención: ofrecer un cuadro deslegitimador de tales acciones. Por ejemplo, se decía como “el nivel de tensión en el campo andaluz no es tan grave como pueda indicar la lectura diaria del parte informativo [...]”. Si hay una conflictividad media que puede estallar en cualquier punto o en cualquier momento”. Sumado al siguiente argumento de peso: “La mayoría de las ocupaciones son meramente simbólicas y apenas diferenciables de una jornada de *picnic*: una huelga general en un pequeño pueblo no consiste en otra cosa que en el cierre de las tres tiendas existentes en el mismo”. Por cierto, tampoco faltaba en aquella ocasión afirmaciones del siguiente tenor: “El SOC ha realizado con frecuencia ocupaciones efectivas de fincas, en ocasiones toleradas por el propietario”. Frente al anterior conflicto real y/o irreal, según se quiera leer, estaba la UGT y su moderada posición –ello a pesar de sus enfrentamientos físicos con miembros del SOC–:

“La Unión General de Trabajadores (UGT), que mantiene estos días una actitud seria y una distancia prudente hacia estos conflictos y confía en el nuevo sistema, tuvo la desgracia, a últimos de diciembre, de ser responsable de un corte de carreteras en Puerto Serrano, que dio lugar a los incidentes más graves de los últimos tiempos, entre ellos la pérdida de un ojo por parte de un jornalero”³⁰⁷.

Por estos caminos ensayados, la *intoxicación* cuando no el *silencio* informativo iba a discurrir, en paralelo, al incremento del conflicto social en su paso de *alarma social* a *emergencia político*, cuando, exactamente, se había un nuevo el *pico* de la conflictividad obrera. No es casual que muchas crónicas laborales dejarían de tener firma en los siguientes días.

Sólo así se puede explicar la *cobertura informativa*, en relación a las movilizaciones a nivel estatal convocada por Comisiones Obreras para el martes 6 de marzo contra la reconversión y de cara a presionar por el cierre de centenares de convenios colectivos. Una jornada de movilizaciones en la que la central comunista se había volcado, y en donde según sus cálculos participarían un cuarto millón de personas. Pues en aquella ocasión, tanto *El País* como el *ABC* apenas dieron cuenta de aquel acontecimiento. Así el primer diario se conformaría con citar claves de agencia, llevando la noticia a un apartado secundario de su Sección de Economía, Sociedad y Trabajo, y con un titular “neutro”³⁰⁸. *ABC* que abría su portada con una de sus habituales obsesiones –“El Tribunal Constitucional ante el aborto”– y que en apartado de *Actualidad Gráfica* daba un titular sobre cogedor –“Los franceses, enemigos del agua y del jabón”– dedicaría tan sólo unas líneas a la jornada de movilización del día

³⁰⁶ Noticia, José Aguilar, “CCOO acepta con condiciones el plan de empleo rural”, *El País*, 4 de marzo de 1984. También por aquellas fechas, Noticia, “Francisco Casero abandona la huelga de hambre”, *El País*, 9 de marzo de 1984, tras el anuncio del conocería popularmente como el nuevo PER.

³⁰⁷ Reportaje, Alfredo Relaño, “La tensión social en Andalucía comienza a preocupar a las autoridades”, *El País*, 5 de marzo de 1984. Días después el mismo periodista desde las mismas páginas informaba, entonces, de lo que se podía considerar verdaderamente como un incremento *real* de la tensión, tras cuestionar en su anterior reportaje la *peligrosidad* de las alarmas emitidas por las autoridades competentes: «Un pueblo que exige garantías de un número suficiente de peonadas al año, un propietario agrícola que no se las quiere dar, un puñado de jornaleros de otro pueblo dispuestos a trabajar a despecho de los intereses de aquéllos y la Guardia Civil, que protege a estos últimos, concurren en El Coronil para crear una situación especial tensa». Concluyendo su entradilla: «El gobernador civil de la provincia de Sevilla, Alfonso Garrido, tema una explosión en cualquier momento». Noticia, Alfredo Relaño, “El gobernador civil de Sevilla, preocupado por el aumento de la tensión en el pueblo de El Coronil”, *El País*, 17 de marzo de 1984. E igualmente sobre la intervención del cuerpo armado de la Guardia Civil en aquel mismo conflicto laboral, véase también la crónica de, Noticia, A.R., “El conflicto de los jornaleros de El Coronil, en vías de solución”, *El País*, 18 de marzo de 1984.

³⁰⁸ Noticia, “Jornada de protesta convocada por CCOO en varias provincias”, *El País*, 7 de marzo de 1984.

anterior. Si con respecto al bloqueo informativo en torno a lo que sucedería con los acuerdos sociales o los diferentes procesos negociaciones de 1983 y 1984, estos se debieron al *pacto de silencio* sellado entre los propios negociadores; lo que aquí ocurriría sería muy diferente. No hace falta ser un conspiranoico o un obsesivo con grandes tramas ocultas de la historia, para verificar cómo se impondría un *bloqueo informativo* por *motu proprio* por parte de los grandes medios de comunicación, sumado a un evidente consenso informativo en torno a la línea editorial a seguir. Si aquello obedecía a algún tipo de recomendación desde otras instancias se desconoce y probablemente nunca se conocerá, pues tales decisiones no suelen dejar rastros documentales.

Pero con todo había conflictos difícilmente ocultables y todavía más difíciles de manipular, en parte gracias al buen hacer de los cronistas laborales, pero sobre todo ya que no pocos de ellos habían cobrado capacidad informativa por sí misma. A Sagunto, lógicamente, nos estamos refiriendo, por más que tampoco se escapara el mismo de cierta *distorsión* mediática. A más de un año del inicio del citado conflicto, los trabajadores de AHM no sólo se habían convertido en un símbolo de lucha obrera, sino en la metáfora de la incapacidades y limitaciones del Gobierno y del propio INI en su proyecto reindustrializador. Convertida en una “prueba de fuego” tras la ofensiva gubernamental del anterior mes, en tan sólo diez días el conflicto, de nuevo, se les iría de las manos.

Pues bien, si el mes se iniciaba con lo que se calificaba como “normalidad en la factoría” al no haberse presentado los 155 trabajadores fijos despedidos, que no tenían relación alguna con el horno alto número 2; con todo se trataba de una *normalidad bastante aparente*. No sólo por el hecho de que los trabajadores mantuvieran contra el criterio de la dirección los hornos en marcha después de veinte días de bloqueo de suministros de carbón, sino por algo más sustancial: los 240 trabajadores eventuales también despedidos se habían presentado en sus puestos. O dicho con otras palabras: los trabajadores y ciudadanos saguntinos no estaban por la labor de que se cerrarán los AHM como así demostró la manifestación de mujeres de los trabajadores enfrente del Palau de la Generalitat por aquellos mismos días. O también por la presentación de un ambicioso contrato-programa elaborado por el Comité de Empresa para la viabilidad del conjunto industrial en su conjunto. Tal y como se informaba, frente a los 500.000 millones que el Gobierno tenía presupuestados para reestructurar el sector, la inversión propuesta por el citado Comité no llegaba ni a los 16.000 millones de pesetas. Un ambicioso *plan* que ponía entredicho los argumentos técnicos y económicos del INI. Una propuesta que sería totalmente omitida³⁰⁹.

Pese a todo, poco duraría la citada *aparente normalidad* como anunciábamos. Al día siguiente –2 de marzo de 1984– la siempre indecisa dirección de AHM iniciaba una nueva maniobra para desactivar la resistencia de los trabajadores. En esta ocasión ordenaba el traslado de 127 empleados relacionados con el tren de abastecimiento del horno alto número 2. Contestación: huelga general para el martes 6 de marzo y continuación de la producción. Una postura que sería atacada duramente los días siguientes por todos los medios, por y a través de un *consenso mediático* cada vez más generalizado sobre la necesidad de terminar de una vez una conflictividad social desatada³¹⁰. Sobre todo cuando se conoció como el día tres más de mil trabajadores –en lo que se calificó por unos de *retención* y por otros de *secuestro*– consiguieron tras “reunirse” con el jefe de relaciones laborales –Ignacio Beristain– la anulación de los despidos de los trabajadores despedidos, y, por tanto, la readmisión de los 155 trabajadores. Un hecho, no sería tolerado por la dirección del INI que anularía de inmediato los acuerdos alcanzados. Se repetía así una historia reciente, pero mucho más cargada de tensión.

³⁰⁹ Noticia, “Los trabajadores de Sagunto piden negociar un contrato-programa para mantener la acería”, *El País*, 2 de marzo de 1984.

³¹⁰ Noticia, Manuel Muñoz, “La dirección de AHM ordena el traslado de 127 trabajadores”, *El País*, 3 de marzo de 1984.

Más allá de las reivindicaciones lógicas –por ejemplo, que la indemnización de los despidos no se fijara por los acuerdos salariales de 1981– un dato relevante lo aportaba la crónica en esa ocasión firmada Jaime Millás:

«Ante el aumento de la tensión originada por el encierro y la actitud desafiante de los concentrados, el presidente del comité de empresa, Miguel Campoy, asumió ante el gobernador civil de la provincia, Eugenio Burriel, el compromiso de salvaguardar la integridad física del jefe laboral, pero agrego que no garantizaba ese extremo si aparecía la policía para disolver a los trabajadores»³¹¹.

Para la derecha aquello sería la *gota que colmaría el vaso*. Los trabajadores no sólo habían desafiado a la empresa, sino a la delegación del Gobierno y por ende a los cuerpos de seguridad. “[L]o acaecido este fin de semana [...] no es ni siquiera explicable. Incurrir en típicas prácticas delictivas, como es la figura del secuestro y del chantaje, es tanto como perder la razón que pudiera respaldar [...] en sus argumentos sobre la viabilidad de esta planta siderúrgica”, apuntaba un durísimo editorial *ABC*. “Sólo desde la premisa de la indecisión gubernamental [...] es posible entender que se plateen este tipo de acciones delictivas”. Tras calificar de *ley de la selva* lo que estaba ocurriendo, y mostrar su preocupación por una posible “huelga general”, se preguntaba: “¿Cabe pactar lo primero [convenios] y ejecutar lo segundo [reconversión] en un ambiente social dominado por el secuestro, las huelgas salvajes y el desafío a la Constitución?”³¹².

En un intento de retomar la previa reacción, el Gobierno, a través del INI, el mismo domingo cuatro anunciaba –paradojas de la vida– el cierre patronal de Sagunto, si los trabajadores despedidos se reincorporaban. A lo que, de nuevo, el Comité de Empresa contestó con otro desafío. En aquella ocasión, *El País* tendría a bien de llevar a primera página lo que podría convertirse en el primer cierre patronal de la época socialista³¹³.

“Grave desafío al Gobierno” anunciaba a toda plana *ABC* bajo la imagen de una mujer cargada de *peligrosos* pasquines. El martes, 6 de marzo, día de la convocatoria de la huelga general en Sagunto, la misma coparía buena parte de las informaciones laborales. Una vez más, la explicación del asunto para el periódico derechista no sólo estaba en la debilidad socialista sino en una conspiración de inspiración marxista, según se podía leer en aquella misma portada:

«Los trabajadores de Altos Hornos de Sagunto no sólo decidieron paralizar la factoría durante veinticuatro horas, sino que para humillar al Gobierno asistirán al trabajo, precisamente los del horno número 2, que la empresa había decidido paralizar. Ante este desafío, atizado por el Partido Comunista, el Gobierno se encuentra entre la espada y la pared. Si cede, se terminó la reconversión industrial en toda España. Si no cede, se encenderá una situación altamente peligrosa en Sagunto»³¹⁴.

Menos dramático *El País* transmitía a través de su portada un mensaje de “tranquilidad” y “normalidad”: “Los despedidos de Sagunto no entraron a trabajar” acompañándose de una fotografía de la asamblea de trabajadores³¹⁵. Al día siguiente, miércoles 7 de marzo, se conocía como el Gobierno había establecido una reducción cercana al 30% de las plantillas de la siderurgia integral. Plan elaborado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y en donde se daban a conocer las decenas de miles de puestos de trabajo que

³¹¹ Noticia, Jaime Millás, “Trabajadores de Sagunto retuvieron a un directivo y le forzaron a aceptar la readmisión de 155 despedidos”, *El País*, 4 de marzo de 1984.

³¹² Editorial, “El secuestro de Sagunto”, *ABC*, 4 de marzo de 1984.

³¹³ Noticia, “El Gobierno cerrará la siderurgia de Sagunto si se reincorporan hoy los despedidos”, *El País*, 5 de marzo de 1984; y ya en páginas interiores, Noticia, Manuel Muñoz, “El INI amenaza con el cierre patronal si los despedidos acuden hoy a su trabajo en la factoría de Sagunto”, *El País*, 5 de marzo de 1984.

³¹⁴ Portada, “Grave desafío al Gobierno”, *ABC*, 6 de marzo de 1984.

³¹⁵ Noticia, “Los despedidos de Sagunto no entraron a trabajar”, *El País*, 6 de marzo de 1984.

costaría la citada reconversión del sector³¹⁶. Todo un aviso bajo la argumentación técnico-científica de que el Gobierno pensaba seguir adelante con su proyecto modernizador.

El día después de las movilizaciones ninguno de los periódicos –como ya adelantáramos– se hacía eco en sus portadas ni de la huelga general en Sagunto ni de las movilizaciones de CCOO, a pesar de que desde el mismo *ABC* se calificaba de “éxito total” la propia huelga, así como la manifestación de más de quince mil personas en el centro de Valencia³¹⁷. Una movilización que se ampliaba con el encierro de “siete obreros, dos esposas de trabajadores y un miembro de la coordinadora de jóvenes” en el Ayuntamiento de la citada localidad. El objetivo: propiciar un debate en TVE con los directivos del INI de cara a discutir su plan de viabilidad³¹⁸.

Que el Gobierno carecía de un plan ya no a medio plazo sino a corto plazo en busca de una salida al conflicto de Sagunto, se volvió a evidenciar el miércoles 7 de marzo, cuando desde Industria se declararían *incompetentes* para negociar con el Comité de Empresa el futuro de los AHM. Otro aviso de que desde el equipo de Solchaga no se pensaba dialogar, y tan sólo se pretendía ya finiquitar la cuestión estrictamente laboral. No cabía posibilidad ni siquiera de discutir lo que también se consideraba la “única política posible”. Por cierto, ese mismo día se informaba como desde la policía seguía investigando, de forma incansable, en torno al origen que dejó un herido de bala en la manifestación del 27 de diciembre de 1983³¹⁹. De este modo, el conflicto se enquistaba sin posibilidad de acuerdo a la vista y con múltiples reticencias por cada parte³²⁰.

Si en Sagunto *llovía sobre mojado* en el Metro de Madrid la memoria vivida estaba demasiado reciente para *aventuras* militares. El conflicto del Metro de Madrid, tras la huelgas de 1976 y las de 1980, en principio, no dejaba de ser otra movilización más en términos estrictos relacionadas con las reivindicaciones laborales y salariales. No obstante, el Gobierno, con el Ministro de Transportes al frente, Enrique Barón –uno de los considerados “ministros sociales”– convertiría este conflicto en otra “prueba de fuego”. Como veremos la salida dada a un problema laboral durante la primera semana de marzo no estaba tanto destinada a solucionar el mismo conflicto laboral en sí mismo o en asegurar el funcionamiento de un servicio público, como en reafirmar la legitimidad cada vez más cuestionada del poder central. Todos y cada uno de los factores de presión, de deslegitimación de la protesta obrera, de manipulación informativa –de nuevo de izquierda a derecha, y viceversa– junto con el “uso legítimo” de la fuerza confluyeron el viernes 2 de marzo.

A mediados de los ochenta el *derecho a huelga*, a pesar de su reconocimiento constitucional, no sólo era un asunto políticamente complicado sino que a nivel jurídico la jurisprudencia se estaba creando sobre la marcha³²¹. Un derecho tantas veces reclamado por el movimiento obrero, como por parte de las fuerzas de izquierda y progresistas, y que ahora se venía cuestionado por un Gobierno socialista. El día 1 de marzo se conocía en la prensa como desde la Fiscalía General del Estado –comandada por el fiscal Luis Antonio Burón– había echado atrás la pretensión del Ejecutivo de acusar de “delito de sedición” a los trabajadores del

³¹⁶ Véanse las cifras en, Noticia, “El Gobierno reduce un 27% las plantillas operativas de la siderurgia integral”, *El País*, 7 de marzo de 1984.

³¹⁷ Noticia, “El INI, dispuesto a reunirse de nuevo con el Comité de Empresa de Sagunto”, *ABC*, 7 de marzo de 1984.

³¹⁸ Noticia, “Miembros del comité de AHM viajan hoy a Madrid para negociar con la dirección”, *El País*, 7 de marzo de 1984.

³¹⁹ Noticia, “Industria se considerara incompetente para negociar sobre el futuro de la acería de AHM”, *El País*, 8 de marzo de 1984.

³²⁰ El viernes de aquella semana se conocía la siguiente, Noticia, “El comité de AHM teme un posible boicoteo al horno alto número 2”, *El País*, 9 de marzo de 1984.

³²¹ Véase lo apuntado en la *nota 74*.

Metro, que habían incumplido los servicios mínimos. Tal y como declaraba el fiscal del Estado a *El País*, “no aprecio [...] intención de atentar contra el Estado en la actitud de los huelguistas”³²². Pero mientras la lógica política y jurídica se asentaba en cauces razonables, las amenazas desde las instancias gubernamentales no cesaban a la hora de aplicar la presión y represión militar-policial. “Los soldados mantendrán mañana el Metro de Madrid si hay una nueva huelga” anunciaba a toda plana *El País*. Ya en la edición de Madrid se podía leer en una crónica no firmada: “[L]a empresa ha solicitado al Ministerio de Defensa que ponga a su disposición los reclutas que hacen prácticas de conducción, con lo que tres de las líneas más importantes funcionarán durante las horas punta”³²³.

Con todo, esta alarmante situación de pre-militarización de un servicio público de transportes, desaparecía, en la práctica, tanto durante el día 2 como el día 3 marzo –así como durante el resto de aquel mes– ya no sólo de las portadas, sino inclusive en el caso de *El País* en la misma Sección de Economía, Sociedad y Trabajo. Un nuevo apagón informativo tanto o más significativo de la situación límite a la que se había llegado. Así pues, en el caso del entonces *diario independiente de la mañana* había que ir hasta el suplemento de Madrid –nada se público en la edición nacional– para saber qué había pasado. En un día en que fue gratuito viajar en el Metro –a pesar de la permanente preocupación por su déficit crónico– entre 150 conductores que no se sumarían a la huelga, “unos 40 soldados en activos y otros 110 de la escala honoraria de ferrocarriles, protegidos por más de 100 policías nacionales” se conseguiría sacar adelante los servicios mínimos, según se afirmaba en una crónica tan sólo firmada con las iniciales A.M. En un evidente ejemplo de desprecio por el legítimo derecho de huelga –no sólo por cuestionarlo en sus bases sino por calificar la huelga de política– junto con una clara muestra de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno para frenar la conflictividad –aun a riesgo de militarizar el Metro de Madrid– el ministro socialista Enrique Barón a la vez que *prometía* abrir nuevos expedientes, declaraba: “está claro que su planteamiento [el de los huelguistas] constituye un inaceptable enfrentamiento político”. Felicitándose por el hecho de “UGT ha coincidido en los mismos términos”. Y añadiendo como aquella huelga se trataba de una “auténtica desobediencia civil y resistencia a la autoridad”³²⁴. Y lo decía uno de los ministros considerados como “sociales” del Ejecutivo socialista como antes adelantáramos.

ABC seguiría una línea informativa similar a *El País* aunque en su línea tradicional. Tras anunciar a toda plana “Tradición católica de la monarquía española”, y hacer mención al “proceso de descristianización que está sufriendo el pueblo español”, dedicada a la citada huelga un mayor espacio que el diario progresista. A pesar de una sucesión de titulares un tanto contradictoria –en su apartado de *Actualidad Gráfica* titulaba: “Se repitió la huelga salvaje del Metro” y en sus páginas interiores, “Los soldados evitaron que la huelga salvaje del Metro provocara otro caos”– llevaba el asunto de la citada huelga tanto a su sección de opinión editorial como a la edición local madrileña. Tras glosar la intervención del ejército español, y bajo un editorial ya orientativo titulado, “Autoridad bajo mínimos”, venía a cuestionar la propia lógica de la intervención militar:

«Si en el pasado este llamamiento tenía una profunda razón de ser, por la inexistencia de un marco laboral democrático, es difícil de justificar hoy, en un régimen de libertades públicas que consagra el sindicalismo libre y el derecho de huelga».

³²² Noticia, Bonifacio de la Cuadra, “El fiscal del Estado descarta en la huelga del Metro el delito de sedición y estudia el de desobediencia a la autoridad”, *El País*, 1 de marzo de 1984.

³²³ Noticia, “El Metro solicita a Defensa reclutas en práctica y reservistas para que mañana mantengan en actividad tres líneas”, *El País*, suplemento de Madrid, 1 de marzo de 1984.

³²⁴ Noticia, A.M., “La policía protegió en los trenes de Metro a 40 soldados, 110 reservistas y a los empleados que no secundaron la huelga”, *El País*, suplemento de Madrid, 3 de marzo de 1984. En un tono un tanto heroico, se adjuntaba a aquella crónica el siguiente reportaje, “Un coronel coordinó la operación militar desde la biblioteca de la empresa del Metro”, *El País*, suplemento de Madrid, 3 de marzo de 1984.

Ahora bien, para el mismo periódico el *peligro obrerista* ya había igualado en peligrosidad al *peligro terrorista*, y ello ante la palpable falta de autoridad del Gobierno:

«Sólo cuando la autoridad se encuentra bajo mínimos se desvían las tensiones sociales de un país desarrollado hacia cauces salvajes, al margen del Estado de Derecho. Nada más alarmante, si exceptuamos el desafío terrorista, que esta amenaza huelguística al margen de la ley. Corresponde al Gobierno, y en primer lugar al ministro de Transportes, la defensa de artículo 28 de la Constitución. Si no lo hace habrá consolidado un peligroso precedente»³²⁵.

Igualmente a lo largo de aquellos días cuando el Gobierno se mostraba tan preocupado por el cumplimiento de los servicios mínimos, también se hablaría de los riesgos que había conllevado poner al mando de los convoyes del suburbano madrileño a reclutas sin apenas formación práctica. Al margen de este pequeño detalle, la militarización del conflicto si bien conseguiría hacer cumplir y respetar los servicios mínimos no cerraría el mismo conflicto. El viernes 2 de marzo los trabajadores reunidos en asamblea convocaban un nuevo como intenso calendario de movilizaciones para el resto del mes de marzo. Movilizaciones que serían desconvocadas pocos días después, tras el principio de acuerdo adoptado en otra asamblea de trabajadores. En lo que se convirtió en otra victoria muy parcial –se aceptaría una subida salarial del 6,5% frente al 10% exigido, aunque se incluían otras cláusulas laborales y salariales novedosas– al menos se conseguiría anular los más de 2.000 expedientes por incumplimientos de servicios mínimos, que hasta entonces había abierto la dirección de la Compañía Metropolitano S.A.³²⁶. Aunque, por otro lado, no se evitaría frenar las 55 suspensiones de empleo de no más de diez días ya aprobadas.

Por lo demás, no puede dejar de reseñarse como hasta *El Socialista* se sumaría al creciente “consenso mediático”. Mientras que *Unión* optaría directamente por *ignorar* las dimensiones alcanzadas por este conflicto, desde las páginas del órgano de expresión oficial del PSOE, se evitaría hacer mención a la militarización del Metro en los primeros días de marzo. Más todavía, pues, tras anunciar en grandes titulares: “Metro: huelga impopular manipulada” en la Portada del número 352 –correspondiente a los días del 7 al 13 de marzo– denunciaría como tal conflicto no dejaba de ser “un desafío a CCOO a la política económica socialista” que “ha tenido la novedad de haber sido convocada sin cumplir ese decreto de servicios mínimos [de 1981], con lo que miles de usuarios se han visto privados de su único medio de transporte un día”.

En un amplio reportaje al respecto –de cuatro páginas– no se dudaría en indicar, tras lo acontecido, lo siguiente: durante el franquismo “no [se] dudó en militarizar a los trabajadores y amenazas a los huelguistas con hacerles consejo de guerra si o se presentaban al trabajo”. Con la defensa del Estado de Derecho, por delante, se recogían las declaraciones de Vicente García Álvarez –Presidente de la Compañía de Metro– al respecto de la actitud dialogadora a la hora de afrontar los servicios mínimos así como la reacción de Enrique Barón. Pero lo más grave, en términos de defensa de lo público a la par que de asunción del *consenso mediático*, sería todo un conjunto de afirmaciones vertidas del tipo de cómo el “Metro ha dejado de ser el medio de transporte más barato”, abriéndose el debate sobre la posible suspensión de los “tramos no rentables”, para lo que, además, se acompañaba del artículo de opinión correspondiente³²⁷. En suma, se estaba ante un claro ejemplo de manipulación y directamente de tergiversación de la realidad.

Si esta suma de conflictos, de movilizaciones, de descontentos acumulados no fue más allá –y no sólo nos referimos a una huelga general– sería, en gran medida, por la considerable

³²⁵ Editorial, “Autoridad bajo mínimos”, *ABC*, 3 de marzo de 1984.

³²⁶ Noticia, “Los trabajadores del Metro y de Gas Madrid deciden desconvocar las huelgas previstas”, *El País*, 9 de marzo de 1984.

³²⁷ Portada, “Metro: huelga impopular manipulada” (p. 1); “El metro de Madrid. Entre las huelgas de CCOO y la mala planificación” (pp. 27-30); OLMEDA, Nino, “Transporte y ocio” (p. 31), todo ellos en *El Socialista*, n° 352, (1984).

división y enfrentamiento sindical, tanto a nivel de base como a nivel de dirección, del que venimos hablando y que durante aquel mes de marzo alcanzaría también límites insospechados. Tras las declaraciones del mes anterior de un dirigente ugetista –José Luis Corcuera– de acusar a Comisiones Obreras de estar preparando una huelga general de carácter político –el lenguaje y la lógica, otra vez, discurrían por extraños senderos– se sumarían otros tantos roces cotidianos; la política de firmar en solitario, o acompañada de sindicatos minoritarios gremiales, continuaría por parte de la CEC de UGT, desactivando en no pocas ocasiones potenciales conflictos³²⁸. Desde el antes citado de la EMT al también citado de Iberia o el más simbólico caso de SEAT. Todo ello con una a nota destacar, la firma de *convenios a la baja* o *la muy baja*. Si en Iberia aceptaría el 5,5% –mostrándose días después escasamente “solidaria” con CCOO tras su expulsión de la mesa de negociación por parte de la dirección³²⁹– en SEAT con mayoría en el Comité de Empresa aceptaría un 5% para 1984, al que sumaría finalmente a la Confederación General de Cuadros (CGC) para que convenio colectivo pudiera tener eficacia general al garantizar el mínimo porcentual³³⁰. En este como en otros tantos casos contaría con la oposición de Comisiones Obreras³³¹.

Reducida la negociación colectiva a la cuestión salarial, lo cierto es que UGT con tales acuerdos se quedaría, en no pocos casos, a una enorme distancia de su política confederal fijada en el 8%, por más que tratara, de cara a sus afiliados, de presentar como un *éxito* los resultados obtenidos³³². Una política de firmar *convenios a la baja* que se evidenciaría, de forma muy destacada, en el convenio colectivo de Banca a finales del mes de marzo, y que con tanto ahínco se había perseguido desde la Ejecutiva ugetista.

El siempre combativo y reconocido sindicalista de UGT, Justo Fernández, recibiría enormes presiones directas, incluso por parte del propio presidente del Gobierno para firmar lo antes posible el convenio colectivo, como se recogía en una nada inocente crónica laboral en

³²⁸ A principios de marzo se reuniría la Ejecutiva de UGT –en concreto un 6 de marzo– para continuar con su política de firmar todos los convenios posibles, en referencia a sectores afectados como Banca, Textil, Construcción, Hostelería y de Empresas Públicas, contando para ello con la mayor «cobertura desde la CEC». AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 26. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 6 de marzo de 1984”, sig. 002251-003. Ha de apuntarse un hecho singular al respecto de este relevante fondo documental que venimos empleando, y que se volverá a observar de forma más intensa durante la negociación del AES. Pese a que desde la salida del XXXIII Congreso de UGT, en junio de 1983, las actas de la CEC estarán, en adelante, numeradas correlativamente, en no pocos casos, hay significativos saltos que tienden a coincidir con los momentos más delicados de cada proceso negociador que aquí se está examinando. En este caso, concreto, si bien en el acta número 26 se recoge la citada reunión de principios de marzo, en las dos siguientes–27 y 28 respectivamente– se recogen las de los días 3 y 10 de abril; y en la número 29, aparece una reunión del 13 de marzo. Una reunión en donde se puede observar cierto *nerviosismo* debido a que todavía el «proceso de negociación no está terminado». Pero sobre todo por lo siguiente: «Se analiza el sondeo de opinión realizado por la empresa EDIS, constatando a través de dicho sondeo la buena posición que tiene nuestra Organización entre el conjunto de los trabajadores, observándose a su vez una baja considerable en el campo andaluz y en los sectores en reconversión». AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 29. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 13 de marzo de 1984”, sig. 002251-003.

³²⁹ Noticia, “La dirección de Iberia excluye a CCOO de la comisión que negocia el convenio”, *El País*, 18 de marzo de 1984.

³³⁰ Noticia, “UGT y la dirección de Seat llegan a un acuerdo salarial por tres años”, *El País*, 10 de marzo de 1984. Igualmente ha de destacarse como no serían estos los únicos casos. Por ejemplo, en el mes de abril llevaría a cabo la misma estrategia en el INSALUD, en Transmediterránea o en el Sector Seguros. Véase lo apuntado en la *nota* 378.

³³¹ Noticia, “Paros en Seat en protesta por el acuerdo alcanzado entre UGT y la dirección”, *El País*, 15 de marzo de 1984.

³³² Véase, “La marcha de los convenios”, *Unión*, nº 50, (1984), p. 5. Con un balance de 159 convenios, y pese a no pocos desmarques por parte de la UGT a la hora de firmar *acuerdos a la baja*, también quedaba constatado a finales de marzo como «la media ponderosa ha sido del 7,7 por 100».

ABC firmada por Javier Ayuso. “Ha sido como un milagro. Se ha firmado el convenio colectivo de la Banca privada. De un día para otro. Justo Fernández, de repente, se ha convertido en un sindicalista moderado”. Una crónica en donde además se apuntaba:

«Pero todo tiene una explicación. Y esta vez no hay excepciones. Hay razones muy claras por que no haya llegado la sangre al río. La primera de ellas es muy sencilla: el Gobierno ha presionado a la UGT para que se reduzca la conflictividad y el ambiente de tensión laboral. O, mejor dicho, el sindicato socialista y su partido han negociado una mayor moderación de la UGT en la negociación de convenios, a cambio de ciertas modificaciones en la política de reconversión industrial. ¿Se acuerdan de aquellas reuniones en la Moncloa con Felipe González, Joaquín Almunia, Carlos Solchaga, Miguel Boyer, Nicolás Redondo...? Pues de allí sale todo»³³³.

Así mismo y como afirmaría Rubén Vega a partir de la citada reunión:

«La UGT se convierte, en las fábricas y comarcadas afectadas por la reconversión, en el principal abanderado de la misma [política de reconversión], defendiendo los acuerdos y avalando la credibilidad de los compromisos adquiridos. Un papel indispensable para que el Gobierno consiga sacar adelante una reconversión que genera fuertes resistencias, que desencadena focos persistentes de conflictividad»³³⁴.

Desde ese mismo momento, por tanto, la central socialista tratará, en adelante, de reproducir tal esquema de actuación. Y, en este mismo, sentido no serán pocos los fracasos cosechados. El primero, en Hunosa. De hecho, en este último caso, no sólo no frenaría el conflicto en marcha sino que terminaría por incendiarlo. En otra negociación a la baja, SOMA-UGT sumado a las asociaciones profesionales, pactarían un aumento del 5,5% y otras *pobres* condiciones laborales³³⁵, tras semanas de negociaciones y movilizaciones marcadas por numerosos incidentes³³⁶. Y no se trataron de incidentes menores, sino de movilizaciones, manifestaciones, cortes de carretas y un sin fin de acciones colectivas, que marcarían el ritmo cotidiano de vida de Asturias, y que llegaría a tener una relevancia en términos de conflictividad similar a la Aceriales o el mismo Sagunto. Por ello aquel *pacto* sería mal recibido no sólo por las Comisiones Obreras, sino por buena parte de los trabajadores implicados. Así pues, si el principio de acuerdo se alcanzaba el 27 de marzo, al día siguiente se convocaba la enésima huelga general por parte de CCOO, que directamente *El País* calificaría de: “Masiva participación en la huelga general de Hunosa”. No era un conflicto cualquiera, pues afectada a la *memoria histórica* del socialismo español. Además en aquel miércoles 28 se demostraría la soledad de la central socialista ante las impresionantes manifestaciones en Mieres, Sama de

³³³ AYUSO, Javier, “El convenio de banca, un síntoma”, *ABC*, 27 de marzo de 1984. En aquel convenio colectivo la subida salarial ya sería del 7,3%. Noticia, “Firmado el convenio de banca con un 7,3% de subida salarial”, *El País*, 27 de marzo de 1984.

³³⁴ VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, op.cit., p. 174.

³³⁵ Noticia, Carlos Fuente, “Principio de acuerdo entre SOMA-UGT y la dirección de Hunosa”, *El País*, 28 de marzo de 1984. Noticia, “CCOO convoca nuevos paros en el sector minero asturiano”, *El País*, 26 de marzo de 1984.

³³⁶ A continuación se presenta una sintética recopilación de noticias tanto en *El País* como en *ABC* en torno a aquel conflicto: Noticia, “Paro de la plantilla de Hunosa contra la oferta de la dirección”, *El País*, 16 de marzo de 1984; Noticia, Carlos Fuente, “La plantilla de Hunosa siguió ayer mayoritariamente el paro”, *El País*, 14 de marzo de 1984; Noticia, “Paros en Hunosa contra la oferta salarial de la empresa”, *El País*, 15 de marzo de 1984; Noticia, “Aumenta la conflictividad en Hunosa”, *El País*, 17 de marzo de 1984; Noticia, “Intentos para desbloquear el conflicto de Hunosa”, *El País*, 20 de marzo de 1984; Noticia, Carlos Fuente, “Los sindicatos rechazan la nueva oferta de un 4% de subida en Hunosa”, *El País*, 21 de marzo de 1984; Noticia, Antonio Palacio, “Incidentes en toda Asturias por la huelga de Hunosa”, *ABC*, 22 de marzo de 1984; Noticia, Carlos Fuente, “Jornadas de paros y manifestaciones de los trabajadores de Hunosa”, *El País*, 22 de marzo de 1984; Noticia, Carlos Fuente, “Los trabajadores de Hunosa protagonizan nuevos incidentes en la cuenca minera”, *El País*, 24 de marzo de 1984; Noticia, “CCOO convoca nuevos paros en el sector minero asturiano”, *El País*, 26 de marzo de 1984.

Langreo y Morera, mientras que no dejaban de reproducir enfrentamientos físicos entre militantes de los principales sindicatos de la nación³³⁷.

Pero más allá de esta estrategia ya consolidada de *desmarque* de la negociación colectiva, dicho mes, asimismo, dejaría algunas representativos ejemplos de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la UGT en su política de pactos. El día 11 de marzo se conocía la firma de un acuerdo marco entre la central socialista y la patronal en Canarias. Una política que incluso daría lugar a discrepancias en el seno del siempre monolítico sindicato socialista, y en donde se reconocería por parte de los *críticos* que se estaba ante un “pacto [que] se considera muy malo sindicalmente hablando”³³⁸. Todo ello se conocía en *El País*, diario poco propenso a airear los “trapos sucios” de la UGT³³⁹.

Ciertamente al sindicato socialista su política de pactos y de apoyo, sin mayores cuestionamientos o críticas, al proyecto modernizador socialista, le estaba empezando a pasar factura. Durante la segunda quincena de aquel *fatídico* mes se conocía también el hecho insólito de que un sector de UGT se unía a CCOO en la huelga de los trabajadores de Telefónica³⁴⁰. Igualmente, un día antes la Federación Estatal de Transportes de UGT tenía que salir al paso de un comunicado de CCOO que aseguraba que en el convenio colectivo firmado en solitario entre la central social y la patronal, existía una cláusula secreta³⁴¹.

A las divisiones internas, a las acusaciones y a otros tantos problemas internos y externos, se iban a sumar otros frentes. Más allá del puro pactismo, de los acuerdos marcos, la central socialista llegaría a verse implicada, nuevamente, en enfrentamientos físicos con los jornaleros del SOC, al haber actuado de lo que popularmente se conoce como *rompehuelgas*, o, en términos técnicos, de haber promocionado a esquirols para las peonadas en el pueblo de El Coronil. Un suma y sigue que a la par que clarificaba la posición de posturas de la central socialista, la iría aislando sindicalmente y deteriorando su imagen dentro y fuera del movimiento sindical.

11.2.5.1. González Márquez en TVE: fabricando *consensos* en torno a la «única política posible»

«El dilema es claro y nadie lo discute. Ahora bien, hay que poner los medios para seguir por el camino emprendido, del que el Gobierno, como ha expresado su presidente, no piensa apartarse. Va en ello el futuro de España. Pero no concierne sólo al Gobierno el desarrollo de la política económica. Como afecta a todos, concierne a todos, tanto en la aportación del esfuerzo que se quiere, como en la cooperación mediante el diálogo o la negociación. Esta es, en síntesis, la cruda verdad que el presidente del Gobierno ha expuesto sin ambages. Así como ha expresado la seguridad de obtener el fruto que

³³⁷ Noticia, Carlos Fuente, “Masiva participación en la huelga general de Hunosa”, *El País*, 29 de marzo de 1984.

³³⁸ Noticia, Carmelo Martín, “UGT y CEOE firman un acuerdo marco en Canarias”, *El País*, 11 de marzo de 1984; Noticia, “División en UGT de Canarias por la firma del acuerdo marco”, *El País*, 20 de marzo de 1984.

³³⁹ Aunque desde el mismo periódico se tendería a *silenciar* los ‘trapos sucios’ de la central socialista, no siempre sería así: Noticia, “Graves acusaciones contra un responsable nacional de UGT”, *El País*, 15 de abril de 1984.

³⁴⁰ Noticia, “Sectores de UGT se unen a CCOO en la huelga de Telefónica”, *El País*, 15 de marzo de 1984. Un mes tarde, directamente, los trabajadores se rebelaban contra lo negociado por UGT. Noticia, “El comité de Telefónica presentará conflicto colectivo contra la revisión salarial”, *El País*, 11 de abril de 1984.

³⁴¹ Noticia, “La central socialista desmiente que haya una cláusula secreta en el transporte”, *El País*, 14 de marzo de 1984.

la política económica emprendida nos anuncia. No habrá vacilaciones en su desarrollo, porque vacilar es perder la ocasión de incluir a España entre las naciones industrializadas del siglo XX».

Editorial, “Adelante, con rigor”, *El Socialista*, nº 353, (1984, 14 al 20 de mayo)³⁴².

Junto a Sagunto, el Metro de Madrid, Renfe, Hunosa....se irían sumando otros tantos conflictos que se mantenían abiertos, en no pocos casos, desde el mes diciembre de 1983. La progresión ascendente y continuada de aquella conflictividad obrera constituía una situación objetivamente complicada para cualquier Administración. Si a esto se le añadía las cifras record en negativo de paro³⁴³, de inflación...que negaban cualquier validez a las previsiones de los técnicos del equipo del Gobierno, junto con las acusaciones múltiples de falta de autoridad, de falta de legitimidad, en suma, de falta de capacidad para gobernar, el escenario objetivo pasaría a la siguiente fase: de *alarma social* a una situación de *emergencia político-social*. En otras palabras, se estaban asistiendo a una normalización del conflicto social, que si bien no termina por estallar, por generalizarse, incrementaba la extendida sensación de crisis política, económica y social. A lo que se añadía el fin del crédito del entusiasmo por el “cambio del 82”, del que los socialistas cada vez eran más conscientes.

En este proceso de normalización de la “emergencia político-social” los medios jugarían un papel clave en todos los sentidos. Tras el llamativo apagón informativo durante la militarización del Metro de Madrid se sumarían otros casos singulares; por ejemplo *El País* durante los diez primeros días de marzo llevaría a primera plana de su portada hasta en cuatro ocasiones no pocos conflictos obreros –el día 1, el del Metro para luego desaparecer, el 4 y el 5 de Sagunto, y el 9 para comentar la situación de varios conflictos obreros– aunque tan sólo dedicaría un editorial a la cuestión. El ya destacado del día 3 relacionado con Iberia y escrito en los mismos términos y con el mismo mensaje que el del 28 de febrero sobre el Metro: “A la luz de estos hechos parece que es inviable una política de reconversión laboral y de contención salarial en Iberia”³⁴⁴, se señalaba. Por su parte *ABC* jugaría en estos mismos días en un doble terreno: mientras que, por un lado, apenas llevaría las movilizaciones a su portada –a excepción del día 6 de marzo en el caso de Sagunto– y con tan sólo un editorial –el del día 4 de marzo criticando el “secuestro” del directivo de AHM–; en cambio en sus páginas interiores intensificaría su ya clásica descalificación al Gobierno, hablando de huelgas salvajes, crisis generalizada, situación de emergencia...

En esta más que difícil coyuntura el *golpe de timón* ensayado en dos fases previas por el Ejecutivo aparecía, a todas luces, insuficiente. A pesar de la iniciativa y dureza mostrada en conflictos como en Sagunto, en el Metro o Iberia, en donde la vía de la negociación una vez descartada había sustituida por la represión pura y dura –en diferentes planos y direcciones– además no parecía ofrecer muchos resultados directos. No se trataba ya de conflictos aislados sino de una tendencia a la generalización de la conflictividad como indicaban los siempre “fiables” datos de la CEOE. El “círculo vicioso” de la conflictividad se había consolidado.

³⁴² Editorial, “Adelante, con rigor”, *El Socialista*, nº 353, (1984), p. 7. Se trata del número que recogería la noticia de la intervención de González como Presidente del Gobierno del 14 de marzo. Y extrañamente, y a pesar de la importancia del momento, apenas se le dedicaría espacio: “La reconversión, ineludible” (p. 10).

³⁴³ Por ejemplo, en aquellos primeros días se conocían las cifras del desempleo total para 1983. *ABC* publicaba un extenso informe –tras una grotesca portada de Mingote– en torno al que era el principal problema económico de España: el desempleo juvenil. Tras un extenso informe al respecto –Noticia, Amancio Fernández, “Sólo uno de cada tres españoles, entre dieciséis y veinticinco años, tiene un puesto de trabajo”, *ABC*, 5 de marzo de 1984– llevaba el asunto a su apartado de opinión, aportando una gran solución al respecto: «Hace falta más disciplina para el Estado y más libertad para la iniciativa privada». Editorial, “Desempleo juvenil”, *ABC*, 5 de marzo de 1984.

³⁴⁴ Editorial, “Las alas de Iberia”, *El País*, 3 de marzo de 1984.

Sin querer ni poder renunciar ni un milímetro a su proyecto de modernizador, no obstante, en el horizonte cercano a corto y medio plazo, el Ejecutivo empezaría a comprender como necesitaba mostrarse flexible en los *tiempos* que no en la *dirección*. Pero restablecer puentes de diálogo comunes parecía, qué duda cabe, una misión imposible en aquellos días. A la par que se abrían fisuras en la UGT –tal y como acabamos de ver– otro tanto sucedía en el mismo Gobierno como en el PSOE.

Por más que se empeñara el Ejecutivo en ofrecer un rostro amable –tal y como sucedió con la declaración de intenciones del Vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra en un Pleno del Congreso de los Diputados cuando anunció que no se impondría la reconversión y que se estaba por el diálogo³⁴⁵– mal casaban aquellos gestos gratuitos a la galería, cuando se había renunciado desde hacía tiempo al diálogo y se había optado por la represión y deslegitimación del movimiento obrero. Además en aquel ir y venir de declaraciones –del mismo Alfonso Guerra a Miguel Boyer pasando por Carlos Solchaga para terminar con Joaquín Almunia y vuelta el camino a empezar– cada vez aparecía más claro la creciente división en el Consejo de Ministros. Cuando no siquiera era imaginable la posterior división entre *felipistas* y *guerristas* –al modo de corrientes de opinión personalistas sin ideología diferenciadora entre ambas– si se pueden detectar ya dos “sensibilidades” que aunque coincidentes con los fines últimos, divergían en la velocidad emprendida. No se trataba tan sólo de las habituales campañas provenientes de la derecha que venían insistiendo en la fracturas en el seno del Gobierno, a la par que defendiendo la posición del equipo económico –todavía más la intervención de Felipe González el 21 de febrero ante el Grupo Parlamentario Socialista³⁴⁶– sino es que hasta el propio *El País* planteaba una similar línea editorial.

El martes 6 de marzo el periodista Martínez Soler se internaba por los primeros síntomas del malestar dentro del Consejo de Ministros: “[L]a Prensa se hizo eco de un eventual golpe de timón para graduar el rumbo de la política económica de Boyer Salvador”. Incidiendo, a su vez, en el grado de soledad del socialismo en aquel preciso momento: “[S]ólo los banqueros se manifestaron abiertamente progubernamentales”. En este continuo descredito en donde se reconocía, sin ambigüedades, como la conflictividad laboral desatada empezaba a hacer mella al igual que los continuos records en cifras de paro –que han tenido “virtud de provocar una notable preocupación”– se hablaba de en algunos medios de “graduar la dureza de su política económica para 1984”. Algo que sería descartado por el mismo Felipe González entonces y en adelante. Con todo, tocaba interpretar los cada vez mayores silencios del mismo Presidente y del propio equipo del Gobierno:

«En estos momentos, medios políticos solventes atribuyen tanto el silencio como la unanimidad de círculos críticos próximos al Gobierno y al partido socialista, en torno a la política económica, a una clara llamada a la disciplina interna, ‘para evitar la repetición del desmoronamiento semejante al de UCD por desavenencias internas’»³⁴⁷.

³⁴⁵ Noticia, “Alfonso Guerra: No sé impondrá la reconversión”, *ABC*, 1 de marzo de 1984.

³⁴⁶ Sin ir más lejos, el día 7 de marzo desde *ABC* se volvía a editorializar en torno a la cuestión. Después de constatar la oficialización de la «crisis actual del Gobierno» así el particular autofustigamiento que mismo Felipe González realizaría en el mes de febrero, según el periódico conservador, introduciría de su *propia cosecha* lo siguiente: «incluso desde algún despacho del Palacio de la Moncloa hay quien alienta esta tensión social, con la esperanza de hundir definitivamente a quien es titular de la Cartera de Economía». Profundizando, al mismo tiempo, en las miserias del socialismo de aquel entonces, llamaba también la atención sobre lo que calificaba la «división interna del partido gubernamental». Y con respecto a un posible cuestionamiento de la política económica emprendida, se decía: «La simple consideración de este debate en la Moncloa es ya un triunfo de ese frente común de de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y un sector del socialismo». Concluyendo con una afirmación de rigor: «No somos incondicionales defensores de la política económica del señor Boyer». Editorial, “La fractura socialista”, *El País*, 7 de marzo de 1984.

³⁴⁷ Noticia, J. A., Martínez Soler, “Una llamada a la disciplina interna suaviza el debate iniciado en el partido socialista sobre la política económica”, *El País*, 6 de marzo de 1984.

La necesidad de retomar los tiempos políticos, de marcar la agenda, que no de *rectificar*, encontrarán su acomodo en el anuncio que el día 9 de marzo se realizaría desde el Gabinete de la Moncloa, y que la prensa recogería al sábado 10: el presidente del Gobierno intervendría en TVE para explicar a la ciudadanía los porqués de la política económica, con especial atención sobre la política de reconversión industrial³⁴⁸. Aunque habituados ya los ciudadanos y las ciudadanas a las sorpresas en aquel tiempo, sin duda aquella hábil jugada maestra –de la que apenas ha quedado rastro en la memoria viva– tendría la virtud de propiciar un *golpe psicológico* a la par que rompía con el habitual silencio gubernamental. Daba inicio la *3ª fase de reacción*.

El medio elegido no era casual y casaba bien con el creciente desapego de los socialistas frente al Congreso de los Diputados. La televisión pública se convertía en el instrumento elegido para explicar la política económica socialista, y así subsanar una de las principales carencias siempre denunciadas fuera y dentro del socialismo: *la falta de una política informativa*. De esta forma, el equipo de González seguía los “sabios” consejos que el propio Carlos Solchaga, allá un 10 de febrero, le ofrecería al Presidente del Gobierno cuando le habló de la *necesidad* de explicar, de *vender* la política industrial, como un todo razonable desde el punto de vista técnico-económico. Se ponía así en marcha una nueva forma de hacer y explicar la pedagogía socialista económica, que tenía algún que otro pequeño antecedente por parte del propio González el año anterior el 21 de enero a los 100 días de su llegada a La Moncloa. Así pues, la citada intervención en TVE cuanto menos marcaría un punto de inflexión en todos los frentes.

En horario de máxima audiencia –las 10.00h de la noche un domingo– sin posibles competidores en tanto no existían otros canales privados, la estética elegida para la ocasión resultaría tanto o más significativa que el mensaje. “El presidente del Gobierno [...] prefirió evitar la frialdad de un despacho oficial y eligió como marco para su discurso televisivo un salón de estar de su pabellón, junto al calor del fuego de una chimenea”. Un espacio, que como recordaba el periodista Fernando Orgambides, resultaba poco o nada original al imitarse el escenario que empleaban los presidentes de Estados Unidos desde Franklin D. Roosevelt. En tiempos que la *ética* perdía ya un considerable terreno frente a la *estética*, la descripción de aquel ambiente no finalizaba ahí: “González vestía una chaqueta azul marino y un pantalón gris, que hacían juego con una camisa azul claro y una corbata de color burdeos, ésta última con el nudo algo caído”. A lo que añadía: “El presidente, maquillado, posó sentado en un sillón de madera, de estilo rústico, junto a una mesa, donde figuraba un retrato del Rey, y dos lámparas de luz”. También se supo gracias aquella excelsa descripción que el mensaje de González estaba grabado al segundo intento y que no se traba de ningún discurso leído³⁴⁹.

Tras todo aquel espectáculo televisado no se escuchó nada que no se hubiera ya afirmado o mencionado en el Congreso, en declaraciones a medios de comunicación o más fríamente se hubiera hecho constar vía BOE. De hecho, si por algo se caracterizaría aquella breve intervención sería por la insistencia en la *idea-fuerza* de que no se pensaba modificar su política económica. Hasta en cuatro ocasiones señalaría, en diferente tono, lo siguiente: “Yo les quiero decir, desde la responsabilidad del presidente del Gobierno, que la política económica se va a mantener con toda firmeza. Es una política económica rigurosa”. Todo ello junto con un contundente mensaje que venía a despejar cualquier posibilidad de flexibilización: “si alguien pretende que cambiemos nuestra política para no alcanzar la modernización de la sociedad español, para no ganar el desafío de la crisis, se encontrará con que el Gobierno no podrá aceptar ese tipo de diálogo”. Un claro mensaje a quien se consideraba como el principal y más peligroso oponente para el proyecto socialista: las Comisiones Obreras tanto en el terreno sindical como político.

³⁴⁸ Noticia, “Felipe González explicará mañana por TVE la situación económica al país”, *El País*, 10 de marzo de 1984.

³⁴⁹ Noticia, Fernando Orgambides, “Un mensaje junto al fuego”, *El País*, 12 de marzo de 1984.

Si un aspecto novedoso –*relativamente novedoso*, cabría matizar– se puede localizar en dichas mismas palabras sería la invocación a retomar el camino del debate entre las partes. Eso sí, sin mucho entusiasmo ni detalles en torno a qué dialogar y sin posibilidad de negociar lo fundamental: la política económica. Frente al destino inexcusable del país –su modernización– no sólo era necesaria la siempre citada política de solidaridad, sino nuevos sacrificios, “para vencer a la crisis”. Sacrificios, solidaridades que exigían diálogo –tal y como se ha “hecho durante el año 1983”– declararía sin ningún tipo de eufemismo el mismo Presidente del Gobierno–. Minutos después declararía: “durante el año 1983 hemos hecho un enorme esfuerzo de explicación a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales”, en tanto “este Gobierno tiene una enorme responsabilidad, pero todos tenemos que ser conscientes de que sólo el Gobierno no puede salvar la situación de la nación”.

A pesar de que la primera parte de aquel discurso terminaría –como acabamos de ver– con frases y consignas ya conocidas, y con no pocas dosis de populismo al estilo peronista –“El Gobierno está dispuesto a sacar a España del hambre”– contenía un cierto espíritu de rectificación en *apariencia* y en *forma*. Tras anunciar una “serie de [futuras apariciones] ante los ciudadanos españoles”, justificaría su intervención en TVE con las siguientes palabras: “porque creo interpretar un estado generalizado de conciencia ciudadana en la que se detecta la demanda de una explicación de acciones del Gobierno [...]. Incluso en los medios de comunicación se está pidiendo que se haga este tipo de explicaciones”. Puesto a la tarea, y tras reconocer como “[h]a habido bastante conflictividad social” y anunciar la intención de “ganar la batalla contra la crisis” –sin moverse tampoco una coma de lo anunciado en el Comité Federal del PSOE de los días 13 y 14 de enero– a continuación venía una cerrada defensa de la política de reconversión y de sus consiguientes sacrificios –económicos y humanos– pero también de sus futuros beneficios. Un pronóstico con un marcado acento liberal que inspiraba tan magna empresa:

«Pero no sólo se hace por eso, para salvar empresas y hacerlas competitivas, se hace también porque, si logramos hacer las empresas sanas, fuertes y competitivas, los recursos que hoy enterramos ahí, el dinero que enterramos y que perdemos en esas empresas el día de mañana, dentro de tres, de cuatro años, podremos emplearlo en empresas con un fuerte futuro».

Por si faltaban dudas en torno al carácter optimista dado a la citada intervención televisada, y tras declarar como “1983 ya ha sido mejor que otros años” –a pesar de no dar un solo dato acerca de la destrucción de empleo u otros similares– cerraba cualquier tipo de especulación o debate en torno al estado de salud de la familia socialista: “Cuanto se diga sobre divisiones internas son especulaciones”³⁵⁰.

En términos históricos, la citada intervención de González en TVE no pasaría a la historia. Pero si marcaría, en nuestra opinión, un punto de inflexión a tener presente. No sólo por el hecho de que el señor Presidente tuviera que intervenir en horario de máximo audiencia para despejar dudas en torno a su política económica; sino también por la peculiar forma de entender el juego político. Dicho esto, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto aquella intervención generaría una serie de reacciones, directas o indirectas, positivas o negativas, sobre todo teniendo en cuenta la enorme capacidad comunicativa del Presidente del Gobierno así como su autoridad personal? Si a nivel interno de la familia socialista aquel mensaje supondría todo un *golpe de autoridad*, de cara a eliminar cualquier posible atisbo disidente; a nivel de las movilizaciones obreras, los efectos son más complicados de calibrar. No hay constancia empírica de una posible correlación entre el discurso de González y el descenso de las movilizaciones obreras. Ello por dos razones, por el rechazo que provocaría en CCOO aquel discurso³⁵¹, así como por la mera constatación de aquel ciclo conflictivo había alcanzado una

³⁵⁰ El mensaje íntegro sería reproducido en, Noticia, “Felipe González anuncia que el Gobierno mantendrá con toda firmeza su política económica y de reconversión industrial”, *El País*, 12 de marzo de 1984.

³⁵¹ Noticia, “Los sindicatos valoran de forma muy distinta la intervención de Felipe González sobre los objetivos de la reconversión industrial”, *El País*, 13 de marzo de 1984.

autonomía propia más allá de circunstancias eventuales políticas. Incluso todavía cabría añadir otra cuestión. Más allá de la resonancia pública que pudieron llegar a tener aquellas palabras – que hoy serían traducidas como un intento de “calmar a los mercados”– en la práctica no influyó en el cambio de correlación de fuerzas tanto en la calle como en los despachos de los agentes sociales, así como en las sedes de los grandes medios de comunicación. En cualquier caso, se comprobó que la frialdad e insensibilidad del Gobierno a la “voz de la calle” tenía sus límites.

Prácticamente tras conocerse las palabras del Presidente se sucederían numerosas declaraciones que, en lo básico, se iban a mantener en los días siguientes. Daba comienzo aquí también una parte central del teatro político que solía acompañar a cualquier gran evento político. Como recogía una rápida crónica del país: “Las primeras reacciones al mensaje del presidente del Gobierno reflejan en términos generales una aceptación crítica en el empresario, un desacuerdo táctico de los partidos políticos –todos habrían preferido el Parlamentario como marco del discurso– una respuesta desigual en el mundo sindical”. Al respecto, mientras que José Luis Corcuera declararía: “El mensaje de González de solidaridad y diálogo es la única receta para superar la crisis”; Julián Ariza, tras denunciar como “nos ha tomado el pelo”, afirmaría como “frente a las protestas obreras y sociales lo que nos ha venido a decir es que va a continuar en la línea que ha provocado dichas protestas”. Añadiendo finalmente: “[El presidente] se ha dirigido a la derecha económica para tranquilizarla y asegurarle que se va a mantener la línea seguida hasta ahora”³⁵². No le faltaba razón al dirigente sindical, pues a todos los empresarios a los que se les había solicitado opinión –José Luis Cerón, Carlos Cortes, Jordi Mercader, Alfredo Molinas, Santiago Foncillas...– habían avalado, en términos generales, la intervención del Presidente. Incluso en aquella ocasión contaría con el respaldo del futuro presidente de la CEOE José María Cuevas, que calificaba de “una nueva lección de pedagogía digna de agradecer”. Y debe tenerse presente que Cuevas no era de los seres humanos que pudiera regalar una sola palabra amable, sino estaba totalmente encandilado con una declaración, una ley o cualquier otra cuestión favorable a sus intereses.

La reacción de los medios tampoco se salió de lo previsible. Quizás por el inusual *tono* escasamente entusiasta destacaría la portada de *El País*: “Felipe González pide en televisión apoyo para la reconversión industrial”. Ahora bien, en su editorial ya mostraba unas mayores dosis de entusiasmo, tras defender jurídicamente –vía reglamento en mano del Estatuto de Radiotelevisión– la intervención de Felipe González en TVE. En todo caso, las *alabanzas* serían pocas en aquella ocasión. Para empezar se criticaría la falta de concreción a la hora de explicar el desarrollo de la reconversión industrial –“[los ciudadanos] no pudieron conocer cómo se llevará a cabo ese proceso ni tampoco cuánto costará su realización”– al que continuaría otra reprimenda por la estrategia seguida hasta el momento en su aplicación: “Pero también existen dudas razonables sobre la habilidad y la eficacia mostradas hasta ahora por el Gobierno en su diálogo con los sindicatos, especialmente con UGT”. En todo caso, el paso dado se consideraba tan importante como necesario. Tocaba, en adelante, *cerrar filas* en torno al proyecto de modernización socialista:

«Nuestro bienestar futuro difícilmente encontrará soluciones en trasnochados planteamientos ideológicos. La solidaridad y la colaboración que el presidente del Gobierno solicitó ayer [...] es un mensaje destinado a la capacidad de modernidad de este país, a su confianza en el reto del futuro, a la necesidad de que los ciudadanos participen personalmente en la creación de riqueza y asuman los riesgos de la innovación frente a la reaccionaria actitud de

³⁵² En *ABC* se recogían las declaraciones efectuadas por el dirigente de CCOO Antonio Gutiérrez: «Es un discurso muy defensivo, al hablar sólo de la reconversión industrial. Es necesaria, pero está sin diseñar la otra orilla. No hay proyecto alternativo de creación de nuevos puestos de trabajo. Es un discurso muy pobre [...]. En cuanto a la oferta de diálogo, queremos que cuanto antes se traduzcan de verdad en una mesa de negociación en profundidad». Noticia, “Antonio Gutiérrez (CC OO): Mesa de negociación”, *ABC*, 12 de marzo de 1984.

convertirse prematuramente en celosos conservadores de situaciones personales que –por otra parte– los cambios de la civilización han puesto en período de liquidación»³⁵³.

Con un énfasis menos reivindicativo y encendido –leído en términos de *agitprop*– como era costumbre, *ABC* señalaba en su portada: “Felipe González, en televisión. Hay que apretarse el cinturón hasta el último agujero”³⁵⁴. Aportaba de novedad, en aquella precisa ocasión, el diario monárquico una encuesta sobre el parecer de los periodistas de los principales medios. La valoración media un 5 en forma y un 4,8 en fondo, en donde quedaba claro la división ideológica: “si para Fernando Jáuregui de *El País* la calificación era de un 7 en ambos apartados, para Pilar Urbano de *ABC* un 5 y un 3,5”³⁵⁵. Por cierto, el mensaje en TVE coincidiría con otra oleada de efervescencia patriótica tras el ametrallamiento a otros pesqueros españoles por parte de la armada francesa, lo que llevaría incluso al *ABC* a mostrarse más que comedida con el Presidente del Gobierno socialista. El enemigo en aquel entonces además de los franceses eran otros viejos conocidos: los comunistas de Comisiones Obreras y lo que denominaba el “sector radicalizado de la propia UGT socialista”. También tocaba cerrar –por una vez– filas ante el riesgo de que las movilizaciones obreras terminaran por desbordar los cauces institucionales. Así pues, detalles y críticas menores en esta ocasión en torno a la vía empleada, se afirmaba:

«[H]emos de reconocer que ese otro riesgo, el riesgo de fondo, ha sido asumido entera y frontalmente por don Felipe González, al manifestar, comprometiéndose con ello, que la reconversión industrial será llevada adelante. Este compromiso del señor González hay que aplaudirlo sin reservas y entenderlo como respuesta sin ambages al reto que han hecho los comunistas de Comisiones Obreras y sindicalistas pertenecientes también a la propia Unión General de Trabajadores».

En cualquier caso no iban a ser todo alabanzas al *patriótico* Presidente, pues no se dejaba pasar la ocasión para recordarle la ausencia de mayores “precisiones sobre los contenidos” de un posible diálogo. Pero ante lo importante, el proyecto de modernización, se apoyaba el mensaje de González al sostener como “no podemos perder más tiempo en la realización de ese proceso reconvensor de nuestra industria”. Se avecinaban tiempos todavía más duros: “Mantener la política de reconversión será ir a un escenario de conflictividad: cada vez más vasto, cada vez más enconado cuando más clara y definida sea la política seguida en este sentido por el Gobierno. Se avecinan, pues, meses de enorme tensión social”. No descartándose llegar a una “situación límite”.

Agitando el fantasma del comunismo disfrazado bajo el recurso del “conflicto sindical europeo”, tampoco se dudaba en afirmar como en “España vive la conflictividad, implícita en toda crisis de cambio [...] agravada y radicalizada por el consumo de unas estrategias revolucionarias de conducción comunista”. Ante tal panorama para *ABC* la única forma de superarlo pasaba por el siguiente anuncio en tono amable y reivindicativo: “El consenso para la

³⁵³ Editorial, “Mensaje a la nación”, *El País*, 12 de marzo de 1984. Por cierto, el *hagiógrafo* *oficioso* de González, Alfonso S. Palomares no ahorraría detalles alegóricos para describir tal intervención: «La tensión aumenta en intensidad hasta límites de alarma, tanto que el presidente del Gobierno decide intervenir a través de la televisión para pedir el apoyo de los ciudadanos a la reconversión industrial. La explicó como una necesidad para superar la crisis, para poder ser un país competitivo y creador de empleo, para afirmar que se apoyará con ayudas sociales a los trabajadores afectados, a través de los fondos del Instituto Nacional de Empleo, las cargas de la Seguridad Social y los Fondos de Protección al Empleo, en este caso para asegurar los salarios a los trabajadores acogidos a él, por un período de tres años hasta su reintegro laboral. Felipe asumió en unos momentos bien dramáticos el papel de líder». PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González. Un..., op.cit.*, p. 294.

³⁵⁴ Portada, “Felipe González, en televisión. Ha que apretarse el cinturón hasta el último agujero”, *ABC*, 12 de marzo de 1984.

³⁵⁵ Noticia, “El presidente defiende la reconversión industrial, en contra de Comisiones Obreras”, *ABC*, 12 de marzo de 1984.

solidaridad es impensable y resulta imposible con la reiteración de la prepotencia y con el ejercicio del rodillo»³⁵⁶.

11.2.6. Punto y aparte de la conflictividad obrera: la necesaria derrota del movimiento obrero (y de CCOO) como base del éxito y de la legitimación del proyecto de modernización socialista (abril-julio 1984)

«Otros datos estadísticos han venido a confirmar dicho cambio en la tendencia, el IPC, índice de precios al consumo, contra lo esperado, sólo ha aumentado en el mes de febrero un 0,4 por 100, por debajo de la media del Mercado Común. Este comienzo descendente en la curva alcista de los precios al consumo permite esperar que la economía siga el comportamiento previsto por el Gobierno, particularmente si la media de los aumentos salariales se mantiene dentro de la franja del 6,5 al 8 por 100».

Editorial, «Síntomas de mejoría», *El Socialista*, nº 356, (1984, 4 al 10 de abril)³⁵⁷.

El paisaje conflictivo —como hemos adelantado— tras la intervención de González en TVE no varió en lo fundamental. Las movilizaciones obreras tenían sus propias dinámicas más allá de coyunturas políticas cortoplacistas. Ahora bien, aquella intervención, empero, sí tendría sus repercusiones en diferentes campos. La primera, el reforzamiento de la *tesis de Boyer* al respecto de los *frentes posibles* abiertos a un mismo tiempo. Lo que concretado, en la práctica, conllevó no abrir el frente de la reconversión naval sin antes no dejar zanjado el de la siderurgia. O, por ejemplo, no *tocar* el muy delicado tema de las pensiones y de la reforma de la Seguridad Social hasta tener cerrado todo el *pack legislativo* de la reforma del mercado de trabajo. He aquí, la segunda gran lección del *non nato* AI'84

En cualquier caso, a partir de estas fechas en términos de conflictividad se producirá un continuado descenso a nivel cuantitativo que no a nivel cualitativo. Una de las razones es que, en gran medida, la intervención del Presidente en la Televisión Pública se produciría en el final del cenit de la oleada conflictividad, aunque entonces no se podía aventurar tal cuestión con los datos en la mano. En este movimiento, también influyó que no pocos conflictos en materia de negociación colectiva se cerrarían antes del final del primer trimestre del año como por otra parte era habitual dados los meses transcurridos. Por otro lado, y aquí tan sólo se está planteando una simple hipótesis, lo que si sucede tras el 11 de marzo es un descenso significativo de la aparición de los conflictos obreros en los dos medios de comunicación que se están siguiendo.

No obstante, todavía en este lapso de tiempo se asiste a la aparición de nuevos conflictos a la par que se radicalizarían viejos conflictos. En este sentido, una constante cada vez más agudizada será el empleo de una mayor violencia hasta llegar a finales de año a emplear comandos especiales del Cuerpo Nacional de Policía para desalojar a los obreros de sus centros de trabajo como ocurría en Euskalduna. A lo anterior, se sumarán los cada vez más éxitos en el haber de la estrategia defensiva del Gobierno, que hábilmente compaginará con llamadas al diálogo. Es decir, da inicio al progresivo re-control de la situación de emergencia social. Estamos, sin ningún género de dudas, ante uno de los grandes éxitos de la primera legislatura por parte del socialismo español.

Claro está que hasta llegar a esa situación de control de la situación tendrían que pasar semanas e inclusive meses. El enconamiento de la conflictividad en el mismo tejido del movimiento obrero era una realidad ampliamente extendida. Un simple vistazo a lo que sucede durante la segunda parte del mes de marzo lo evidencia. Por un lado, nos encontramos con todo un conjunto de nuevos conflictos, y que responden a las tres variables explicativas ya descritas

³⁵⁶ Editorial, «Desafío a Comisiones», *ABC*, 12 de marzo de 1984.

³⁵⁷ Editorial, «Síntomas de mejoría», *El Socialista*, nº 356, (1984), p. 7.

en más de una ocasión así como a los mismos esquemas de acción colectiva. Por ejemplo, dan inicio las fuertes protestas contra la reconversión en el sector tabaquero. No era menor lo que allí se jugaba para los trabajadores y vecinos del Valle del Tiétar en donde se producía el 80% de la cosecha nacional del país, y los planes gubernamentales amenazaban con dejar en la calle a más de 7.000 trabajadores en una región con terribles problemas económicos endémicos³⁵⁸. A las iniciales movilizaciones y encierros en diversos pueblos, se sumarían numerosas manifestaciones como las que tendrían lugar el 24 de marzo en Navalmoral de la Mata con la asistencia de más de 25.000 personas³⁵⁹. En una progresiva radicalización de los cortes intermitentes de la Nacional V se pasaría ya en el mes de abril a la propia ocupación de la carretera mediante más de 500 tractores aparcados en la misma y de ahí a unos considerables enfrentamientos con la policía con varios parlamentarios detenidos y agredidos³⁶⁰.

Por lo demás, las movilizaciones por la negociación colectiva seguirían marcando, en buena parte, la agenda informativa laboral tanto por los continuados éxitos –con algún sonado fracaso de por medio– como por la *habitual violencia* que acompañaba a este tipo de movilizaciones. Así, por ejemplo, los trabajadores de Artes Gráficas protagonizarían repetidos éxitos los días 22 –con un seguimiento en Madrid del 100%³⁶¹– los días 27, 28 y 29 de marzo³⁶². En el terreno de los fracasos y nuevamente de la división sindical –vía desmarque de la UGT– se situarían las movilizaciones y los paros convocados en Campsa. De hecho, tras el primer día –el miércoles 28 de marzo– de huelga se hablaría de “débil respuesta” en los medios, en donde influiría la desconvocatoria de última hora por parte de la UGT³⁶³.

Como avanzábamos en estos nuevos conflictos que surgen no faltaría el recurso a la violencia. Así el 15 de marzo tras un día de movilizaciones en el sector de metal de Zaragoza tres trabajadores resultarían heridos de la factoría de Figueruelas General Motors, junto con un empresario tras graves disturbios. Una movilización que también contaría con el desmarque de la UGT a la hora de convocar la manifestación –que no la jornada de lucha a la que se sumaría– por no considerarse “partidaria de [...] [ese] tipo de movilización”³⁶⁴. Por su parte, los trabajadores de Sniace en Torrelavega no dudarían en llegar a insultar e inclusive a agredir a los directivos de la fábrica tras reprocharles su negativa a negociar el convenio, mientras persistiera su huelga³⁶⁵. Tampoco faltarían como medida de presión la huelga de hambre de los trabajadores de Cointra en Alcalá de Henares ante sus despidos³⁶⁶.

A todo lo anterior se sumaría –y he aquí una novedad en términos de acción colectiva a tener presente– la implantación y crecimiento de las Coordinadoras de Asambleas de Parados,

³⁵⁸ Noticia, “Movilizaciones contra el proyecto de reconversión del sector tabaquero”, *El País*, 13 de marzo de 1984.

³⁵⁹ Noticia, “Masiva manifestación contra la reconversión del tabaco”, *ABC*, 25 de marzo de 1984.

³⁶⁰ Véanse, respectivamente, Noticia, “Protesta de tabaqueros”, *El País*, 29 de marzo de 1984; Noticia, “Duros enfrentamientos entre la Policía y los taqueros extremeños”, *ABC*, 2 de abril de 1984; y, Noticia, “Los tabaqueros cacereños suspenden los cortes de tráfico”, *El País*, 5 de abril de 1984.

³⁶¹ Noticia, “La huelga de artes gráficas afectó al 85% de los trabajadores”, *El País*, 23 de marzo de 1984.

³⁶² Noticia, “Huelga de artes gráficas”, *El País*, 29 de marzo de 1984.

³⁶³ Noticia, “El comité de empresa de Campsa convoca huelga para los días 28, 29 y 30 de marzo”, *El País*, 18 de marzo de 1984; Noticia, “Débil respuesta del personal de Campsa al paro convocado”, *El País*, 29 de marzo de 1984.

³⁶⁴ Noticia, Javier Ortega, “Tres trabajadores contusionados y un empresario agredido en Zaragoza”, *El País*, 16 de marzo de 1984.

³⁶⁵ Noticia, “Agredido el director general y otros directivos de Sniace”, *El País*, 19 de marzo de 1984. Prácticamente una semana después, la UGT firmaría en solitario un acuerdo en solitario tras más de un mes de lucha los trabajadores. Noticia, “Fin de la huelga en Sniace”, *El País*, 25 de marzo de 1984.

³⁶⁶ Noticia, “Trabajadores de Cointra en huelga de hambre”, *El País*, 22 de marzo de 1984.

que empiezan a adquirir fuerza en el mes de marzo, para en el siguiente mes llevar a cabo no pocas acciones públicas. Un hecho bastante novedoso y que reflejaba el profundo problema del desempleo en España a mediados de los ochenta, pero también los límites e incapacidades de los grandes sindicatos para poder responder social y solidariamente este grave problema. No faltarían acciones de todo tipo: desde bloquear trenes interregionales para denunciar el extraordinario gasto en horas extraordinarias de RENFE³⁶⁷, pasando por encadenarse a la puerta de la Diputación Foral de Navarra para protestar contra la Ley Básica de Empleo³⁶⁸, hasta manifestaciones para denunciar la alarmante situación de desempleo, tal y como sucedió en Burgos en octubre de aquel mismo año³⁶⁹.

A estos nuevos frentes debían de sumarse viejos conflictos enquistados con peligrosas derivas violentas. Casos significativos serían los de Astano³⁷⁰ o más específicamente los de Hunosa, cuya conflictividad no hacían más que aumentar³⁷¹. Por lo demás, y viendo como había transcurrido el conflicto del Metro de Madrid, tampoco faltó mucho para que, de nuevo, el Gobierno mandara militarizar RENFE durante la segunda quincena de marzo y el mes de abril³⁷². Resulta este un caso, especialmente, interesante de la ruptura de la reproducción del esquema de actuación que desde el Gobierno, la patronal y una parte de los agentes sociales – nos referimos a la UGT– se realiza a la hora de tratar de desactivar dicho conflicto laboral.

El problema laboral de RENFE venía de lejos. Ya a finales de 1983 se anunciaría la inminente remodelación de una de las empresas con mayor déficit del Estado. Tan sólo en aquel año costaría 159.810 millones de pesetas a las arcas del Estado³⁷³. Una *ofensiva* basada tanto en un brutal recorte de la subida salarial para 1984 –una media del 3,6%– así como en la eliminación en los programas sociales de la empresa pública. De esta forma, a mediados de aquel mes se conocía la convocatoria de huelga para los días 23 y 30 de marzo por parte del Comité de Empresa³⁷⁴. Comienza, entonces, una lucha por los servicios mínimos, a lo que se sumarán permanentes movilizaciones en las principales estaciones del país, empezando por Atocha y Príncipe Pío en la misma capital³⁷⁵. Al mismo tiempo, según se acercaba el primer día de huelga –el viernes 23– más claro quedaba que la UGT estaba negociando a espaldas del

³⁶⁷ Noticia, Jaime Millás, “Parados de Valencia bloquean la salida de trenes en la estación del Norte”, *El País*, 4 de abril de 1984.

³⁶⁸ Noticia, Carmelo Ridruejo, “20 parados se encadenaron ayer en Pamplona para protestar contra la Ley Básica de Empleo”, *El País*, 19 de abril de 1984.

³⁶⁹ Noticia, Ángeles Gil, “Manifestación de 1.500 personas contra el paro en Burgos”, *El País*, 8 de octubre de 1984.

³⁷⁰ Noticia, “Encierro en Astano”, *El País*, 25 de marzo de 1984.

³⁷¹ Tan sólo en relación a la primera mitad del mes de abril se pueden localizar en la prensa los siguientes titulares: Noticia, “Conflictividad de Hunosa”, *El País*, 4 de abril de 1984; Noticia, “Incidentes por la actuación de piquetes en la huelga de Hunosa”, *El País*, 5 de abril de 1984; Noticia, “Paros en Hunosa”, *El País*, 10 de abril de 1984; Noticia, “Continúan los paros en Hunosa”, *El País*, 11 de abril de 1984. Véase también lo apuntado en la *nota* 336.

³⁷² A principios de abril se publicaba el Real Decreto 635/1984, de 26 de marzo, *sobre garantía de prestación de servicios mínimos en materia de transportes por carretera* [B.O.E. 2 de abril de 1984]. Otro ejemplo más de la limitación del Derecho de Huelga por parte del Gobierno socialista y más concretamente por el titular de Transportes, Enrique Barón. Véase, Noticia, “Servicios mínimos en las huelgas de transporte público por carretera”, *El País*, 3 de abril de 1984.

³⁷³ Noticia, Manuel Navarro, “Renfe, aunque rebajo el déficit, costó al Estado 159.810 millones de pesetas en el ejercicio 1983”, *El País*, 27 de abril de 1984. Véase igualmente, Noticia, “El déficit de Renfe es mucho más veloz que sus trenes”, *El País*, 21 de octubre de 1984.

³⁷⁴ Noticia, “El comité de Renfe ratifica la huelga para los días 23 y 30”, *El País*, 14 de marzo de 1984.

³⁷⁵ Noticia, “La plantilla de Renfe realizará mañana un paro de 24 horas”, *El País*, 22 de marzo de 1984.

propio Comité de Empresa para llegar un acuerdo marco. Hasta tal punto, que la noticia saltaría a la fecha aquel mismo día, y en donde ya decía: “[El posible acuerdo] hace prever que ese próximo paro será desconvocado”³⁷⁶. Al día siguiente de la huelga –calificada como un “éxito” por los mismos medios de comunicación– todavía se conocía más lo avanzado del acuerdo de UGT al que se había sumado en las últimas horas el Sindicato Libre Ferroviario. Entre los dos sumaban 37 votos en el Comité, tan sólo uno menos que los posibles sumados entre CCOO y USO. Un *acuerdo*, una vez más, *a la baja* en lo salarial y en donde también se aceptaban considerables recortes de derechos sociales –por ejemplo, una reducción de 15 minutos para el tiempo de *el bocadillo*–³⁷⁷. Una vez la *ruptura* de la unidad de acción se daba como un hecho consumado³⁷⁸.

El día 28 de marzo se conocía la desconvocatoria del paro para dos días después. La dirección de la empresa daba por válidos los acuerdos alcanzados con UGT y el Sindicato Libre Ferroviario, aunque tenían que someterse a referéndum entre los más de setenta mil trabajadores de RENFE³⁷⁹. Convocado el mismo para la primera semana de abril, el viernes 6 estallarían la *sorpresa*. Tanto en RENFE como en Iberia los trabajadores rechazaban los acuerdos alcanzados entre la empresa y UGT. Y en el caso de la compañía ferroviaria sería por un amplio margen de votos: 66,5% en contra frente al 29% a favor. Sin duda, aquello supondría un varapalo tremendo a la estrategia de UGT³⁸⁰. Y pese al varapalo, pero sobre todo su trascendencia al dejar en evidencia su política de pactos de *convenios a la baja* y su efecto desmovilizador –tanto en el caso de RENFE como en el de Iberia– no se renunciaría a la misma, tratando de darle la vuelta a la situación con *nuevos acuerdos por arriba*, tras la reunión de la CEC el 10 de abril³⁸¹.

Así tocaba volver a empezar, prácticamente, de cero. CCOO, gran triunfadora, presentaría un amplio calendario de movilizaciones para el mes de abril que venían a coincidir

³⁷⁶ Noticia, “Hoy no hay trenes de largo recorrido por la huelga de 24 horas de Renfe”, *El País*, 23 de marzo de 1984.

³⁷⁷ Noticia, Félix Monteiro, “La huelga secundada ayer por los trabajadores de Renfe paralizó más del 80% del tráfico ferroviario nacional”, *El País*, 24 de marzo de 1984.

³⁷⁸ No serían estos los únicos casos. Por ejemplo, en aquel mismo de abril llevaría a cabo la misma estrategia en el INSALUD, en Transmediterránea o en el Sector Seguros, entre no pocos otros casos y con similares resultados finales. Noticia, “UGT firma en seguros”, *El País*, 5 de abril de 1984; Noticia, “Acuerdos en Insalud”, *El País*, 5 de abril de 1984. Más adelante, Noticia, “Transmediterránea”, *El País*, 19 de abril de 1984.

³⁷⁹ Noticia, “Desconvocado el paro de Renfe previsto para el día 30”, *El País*, 28 de marzo de 1984.

³⁸⁰ Noticia, “Los trabajadores de Renfe inician hoy el referéndum sobre el convenio colectivo”, *El País*, 4 de abril de 1984; Noticia, “Los trabajadores de Renfe e Iberia rechazan en votación las propuestas de convenio colectivo”, *El País*, 4 de abril de 1984. Días después, el Secretario General de UGT-Transportes, declararía al respecto de las causas del *triunfo del no* en el referéndum, como los trabajadores no habían entendido la necesidad de los consiguientes sacrificios a realizar: «[D]espués de una gran campaña por el *no* que arrastró a los sectores más radicalizados, porque el argumento de los derechos adquiridos ha sido decisivo en un colectivo corporativista y porque la mayoría de los trabajadores no ha valorado lo que suponía el convenio ya que no lo ha leído». Declaraciones recogidas en, Noticia, Félix Monteiro, “Las direcciones de Renfe e Iberia aseguran que no cancelarán ningún servicio por los paros convocados para Semana Santa”, *El País*, 11 de abril de 1984.

³⁸¹ Más sosegados en la reunión de la Ejecutiva de UGT se examinaría detalladamente el asunto. En concreto se llegaría a señalar en el acta: «En consecuencia con la situación creada se acordó realizar las gestiones oportunas con la Administración con el fin de buscar soluciones acordes con los planteamientos sindicales que ha venido manteniendo nuestra Organización en el proceso de la negociación de dichos Convenios Colectivos». AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 28. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 10 de abril de 1984”, sig. 002251-003.

con las festividades de Semana Santa³⁸². Tras conocerse tal calendario, pero sobre los resultados de los sendos referéndums, desde las direcciones tanto de RENFE como de Iberia iniciarían una ofensiva, dando por concluidas las negociaciones y especialmente negándose a negociar cualquier tipo de servicio mínimo³⁸³. Una actitud que sería, a su vez, reforzada por la posición adoptada por el sindicato socialista: “Los representantes de UGT en las empresas Iberia y RENFE ha dejado claro que mantendrán una actitud pasiva en las huelgas convocadas por Comisiones Obreras”³⁸⁴.

A partir de ahí, y en los días siguientes se va a iniciar una brutal ofensiva mediática contra las huelgas previstas. Un claro ejemplo lo encontramos en *ABC* quien siempre servicial a las “causas justas” no dudaría en presentarse como futurólogo. Así el viernes día 13 de abril, fecha de los primeros paros parciales convocados por el Comité de Empresa –con el apoyo de UGT– anunciaba en su portada: “Fracasó Comisiones Obreras”. Se podía leer también allí: “El intento de Comisiones Obreras de hacer daño al Gobierno socialista, creando una situación caótica en el transporte de viajeros durante las vacaciones de Semana Santa parece condenado al fracaso”³⁸⁵. En un agresivo editorial del mismo viernes, tras repetir los argumentos de su portada, se señala sin ningún tipo de ambigüedad: “Porque también aquí todo parece indicar que la motivación principal de las huelgas es política: una ofensiva de los sindicatos comunistas contra el Gobierno”. Tras hablar del *uso abusivo* de las huelgas y del *descredito de su uso*, terminaba su diatriba con un grito a favor de su regulación y limitación jurídico-constitucional³⁸⁶. De hecho, tal llegaría a ser la situación de tensión y presión que desde CCOO el día anterior se decidiera “no apoyar” los paros para aquel viernes, como “consecuencia del confusionismo creado y del elevado nivel de servicios mínimos impuestos”³⁸⁷. Finalmente, aquel conflicto perduraría durante los siguientes meses en una suma no correlativa de *victorias parciales* y derrotas contundentes³⁸⁸.

Otro *viejo conflicto* que estallaría durante la segunda quincena del mes de marzo y que se extendería durante buena parte del mes de abril, sería el de la Construcción. Aquí, una vez más, se puede observar detenidamente las limitaciones y contradicciones de la estrategia de desmarque de la UGT, así como las consecuencias del *non nato* AI’84. Teniendo por epicentro fundamental Madrid, en dichas fechas se cumpliría la sexta huelga con un seguimiento del más 90%. El problema central a resolverse la subida salarial: 10% para los sindicatos, 5,5% por parte de la patronal³⁸⁹. Pero sería, justamente, a partir de esas fechas cuando ya UGT se empiece a desmarcarse con un *llamamiento* por separado. Pese a lo anterior, los paros convocados para los días 21 al 23 de marzo y del 26 al 29 de aquel mismo mes, tendrían también un elevado seguimiento, extendiéndose las movilizaciones a otras provincias como

³⁸² Noticia, “Huelga en Renfe”, *El País*, 9 de abril de 1984.

³⁸³ Noticia, Félix Monteiro, “Las direcciones de Renfe e Iberia aseguran que no cancelarán ningún servicio por los paros convocados para Semana Santa”, *El País*, 11 de abril de 1984. Véase asimismo: Noticia, CCOO desconvocará los paros de Renfe si se acepta su oferta de revisión salarial”, *El País*, 12 de abril de 1984.

³⁸⁴ “Iberia y Renfe: Los trabajadores rechazan los acuerdos”, *Unión*, 51-52, (1984), p. 17.

³⁸⁵ Portada, “Fracasó Comisiones Obreras”, *ABC*, 13 de abril de 1984.

³⁸⁶ Editorial, “Huelga en Semana Santa”, *ABC*, 13 de abril de 1984. Léase también el artículo de opinión publicado aquel mismo día y en aquel mismo periódico firmado por: CARRASCOSA, José Luis, “La huelga fantasma”, *ABC*, 13 de abril de 1984.

³⁸⁷ Noticia, “Desconvocada la huelga parcial prevista para hoy en Renfe”, *El País*, 13 de abril de 1984.

³⁸⁸ Noticia, “CCOO desconvoca los paros previstos para mañana y el día 24 en Renfe”, *El País*, 17 de abril de 1984.

³⁸⁹ Noticia, “Prorrogada la huelga en el sector de madera y corcho de Madrid”, *El País*, 14 de marzo de 1984.

Segovia y Bilbao³⁹⁰. Aquí como en tantas otras ocasiones el ritmo e intensidad de las movilizaciones se irían incrementando hasta llegar a situaciones de violencia. Por ejemplo, el martes 27 de marzo se producían considerables incidentes tras cortes de tráfico y enfrentamientos con la policía, lo que terminaría con 27 detenidos³⁹¹. A partir de ahí, la violencia iría en aumento: así se contabilizaron numerosos incidentes durante las diez primeros días en Barcelona, llegándose a la retención de los negociadores en Guipúzcoa³⁹² o directamente al secuestro en Granada de 17 funcionarios del Ministerio de Trabajo por más de 300 trabajadores³⁹³. Mientras esto sucedía, la Federación de Construcción UGT seguiría con su estrategia de negociación, en paralelo, hasta el punto de llegar a firmar en solitario a principios de abril –el 4 de abril, un miércoles en donde también firmaría las bases de la futura reconversión naval– el primer acuerdo marco de la construcción con la Confederación Nacional de la Construcción. Un nuevo *convenio a la baja* con tan “sólo” un subida salarial del 7,5%, y en donde se dejaba libre a la negociación la inclusión de la hora del bocadillo en el tiempo de trabajo efectivo o no³⁹⁴. Un acuerdo marco que rápidamente sería trasladado a ámbitos regionales o locales como sucedería en el caso de la provincia de Barcelona³⁹⁵. Firmado el mismo, no se tendría mayores reparos en *venderlo* como parte de la *nueva cultura sindical* pregonada, bajo el argumento: “Se había llegado a una situación que, de no encontrar un acuerdo, hubiera significado una huelga general en España en el sector de la construcción”³⁹⁶.

La *nómina de conflictos* abiertos no finalizaría ahí. Desde los trabajadores de Correos, pasando por los de las clínicas y otros tantos continuaban abiertos. En todo caso, algunos reducirían su intensidad en relación a los primeros meses de 1984. Así en el caso del campo de andaluz se rebajaría algunos puntos la tensión social. Lo que no significa, en ningún caso, que las movilizaciones finalizarán. De esta forma, a finales del mes confluirían tres marchas de jornaleros en Madrid en protesta por el nuevo seguro agrario³⁹⁷. En los siguientes meses y hasta el final del año el problema del campo tendría sus diferentes fases de *alza* y *baja*, en donde se reproducirían las movilizaciones, encierros, huelgas... hasta llegar, nuevamente a enfrentamientos con la policía³⁹⁸. Hasta tal punto, de que conseguirían ser recibidos por el mismo presidente del Gobierno³⁹⁹.

³⁹⁰ Noticia, “Huelga en el sector de la construcción en Madrid y Segovia”, *El País*, 22 de marzo de 1984; Noticia, “Paros en construcción”, *El País*, 24 de abril de 1984.

³⁹¹ Noticia, “Detenciones y cortes de tráfico en Madrid por la huelga de la construcción”, *El País*, 28 de marzo de 1984.

³⁹² Noticia, “Trabajadores de la construcción de Guipúzcoa retienen a los negociaciones del convenio”, *El País*, 20 de abril de 1984.

³⁹³ Noticia, “300 obreros de Granada retienen a 17 funcionarios de Trabajo”, *El País*, 27 de abril de 1984.

³⁹⁴ Noticia, “UGT y la patronal firman el primer acuerdo marco de la construcción”, *El País*, 5 de abril de 1984; Noticia, “CNC y UGT firmaron el primer acuerdo estatal en construcción”, *ABC*, 5 de abril de 1984.

³⁹⁵ Noticia, “Polémicas sobre la incidencia de la huelga de construcción en Barcelona”, *El País*, 11 de abril de 1984.

³⁹⁶ “Construyendo un acuerdo”, *Unión*, nº 51-52, (1984), pp. 20-36.

³⁹⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “Concentración de jornaleros ante el Ministerio de Trabajo”, *El País*, 29 de marzo de 1984. Una protesta que no finalizaría ahí. Noticia, “80 jornaleros andaluces mantienen un encierro en una iglesia madrileña”, *El País*, 2 de abril de 1984.

³⁹⁸ Noticia, Alfredo Relaño, “Herido un policía nacional en enfrentamientos entre jornaleros y fuerza pública”, *El País*, 17 de abril de 1984; Noticia, “Los jornaleros de Marinaleda mantienen la ocupación del embalse de Cordovilla”, *El País*, 23 de abril de 1984. Meses más adelante, tras el verano de aquel año, se retomaría con energía las movilizaciones de los jornaleros: Noticia, Rafael Arboleda, “Movilizaciones en el campo andaluz en contra del Plan de Empleo Rural”, *El País*, 5 de septiembre de 1984. En octubre de aquel año, *ABC* dedicaba un amplio reportaje a la situación límite del pueblo de Jaén,

Lo que si parecía cada vez más evidente según se acercaba el final del mes de marzo así como a lo largo de las primeras semanas de abril, es que buena parte de los conflictos originados por la negociación colectiva, iban llegando a su fin como por otro lado era normal. Inclusive a lo largo de aquel año, por el contexto explosivo, que hemos explicado y diseccionado en páginas anteriores, se alargaría más de lo habitual. Y, claro está, no faltarían los balances positivos por parte del entorno socialista, tanto del Partido como desde el Sindicato, en una estrategia totalmente complementaria. Y añadiríamos interconectada, en tanto ambos compartirían un punto de acuerdo clave: la superación del riesgo de una crisis generalizada. .

Centrándonos, por el momento, tan sólo en este aspecto de la conflictividad, debe recordarse, antes de avanzar, lo siguiente: tanto UGT como el PSOE partieron siempre de asumir la validez de las previsiones gubernamentales contenidas en los PGE de 1984, con respecto al IPC. E inclusive, una vez revisadas las mismas –a mediados de enero, en plena negociación del AI’84 enero– y dadas a conocer por Economía –quien, de un solo golpe, pasaría del 8% al 12,3%-12,4%– no se moverían de sus posiciones de partida. En términos generales, omitirían el asunto entre desmentidos y afirmaciones entrecruzadas. Lógicamente, en este contexto y manejados estos datos, la preocupación del Ejecutivo por la banda salarial buscada por UGT de entre el 5,5%-6,5% al 8%, entraba dentro de sus previsiones de su “llamada” *moderación salarial*⁴⁰⁰.

Por más que de puertas para afuera como para adentro, desde UGT no se dejara de apuntar a lo largo de los meses de marzo, abril o inclusive mayo –cuando la atención a la conflictividad disminuiría enteros, ante las futuras negociaciones del AES– como la evolución global de los salarios pactados en convenio se encontraba dentro de sus previsiones de cara a mantener el poder adquisitivo⁴⁰¹; la realidad económica les volvería a sobrepasar, mes a mes, cuando los datos del IPC iban dando la razón a las previsiones de Economía de enero, y ello, a pesar, de que las mismas quedarían casi un punto más bajas de lo re-pronosticado –11,3%– a finales de año. Una evolución macroeconómica que, en la práctica, sería ignorada por parte de estos actores⁴⁰².

Jódar: Reportaje, DOMÍNGUEZ, Ricardo, “Jódar, un pueblo al rojo vivo”, *ABC*, 3 de octubre de 1984. Y para finalizar el año, se producirían nuevas huelgas de hambre en el campo andaluz. Noticia, Carlos Funcia, “Hospitalizado uno de los 10 jornaleros en huelga de hambre en Sevilla”, *El País*, 21 de diciembre de 1984.

³⁹⁹ Noticia, “Los jornaleros de Marinaleda serán recibidos por el presidente González”, *El País*, 22 de abril de 1984.

⁴⁰⁰ Corcuera hablaría de la dificultad de firmar cláusulas de revisión salarial, lo que consideraba como un «síntoma muy peligroso», ya que «en tiempos de crisis y cuando estamos negociando en base a inflación prevista ha sido una gran conquista del sindicalismo español desde hace unos años que si se deteriora ahora puede poner en peligro el mantenimiento del poder adquisitivo». PADILLA, Sol, “La lenta marcha de la negociación colectiva”, *El Socialista*, nº 356, (1984), p. 32.

⁴⁰¹ La palabra, el concepto clave manejado sería el siguiente: según la CEC de UGT los convenios firmados estaban «constatando que los resultados obtenidos al día de hoy se enmarcan dentro de la filosofía que ha mantenido nuestra Organización en todo el proceso de negociaciones que se realizó con la CEOE y CCOO». AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 27. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 3 de abril de 1984”, sig. 002251-003. No obstante, en la última referencia específica con respecto a la marcha de la negociación colectiva a finales de abril en lo referente a las propias actas de la Ejecutiva de UGT, se seguiría evidenciando la preocupación por los «Convenios que faltan por firmar, como la situación sectorial del Sector Naval dentro de la Política de Reconversión Sectorial». AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 22. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 24 de abril de 1984”, sig. 002251-003.

⁴⁰² Junto con lo apuntado en la *nota 219*, *nota 268*, *nota 332* entre otras, se continuaría la ‘campana informativa’ durante los meses de mayo y junio, al respecto de la marcha de los convenios colectivos, manteniendo muy similares puntos de análisis. CALVET, Enrique, “Conclusiones que siguen vigentes.

Así mismo, desde este mismo punto de vista, la UGT contribuiría de forma eficaz en los objetivos buscados en esta *fase reformista* de la modernización socialista. Aunque lógicamente no pueda responsabilizarse a la propia Unión General de Trabajadores de la pérdida de poder adquisitivo, contribuiría, a su manera, en tal hecho histórico-económico. Pero quizás, no se encuentre aquí el “valor instrumental” más relevante otorgado tanto desde el Ejecutivo como desde el Partido al Sindicato hermano, pues, ante todo, el sindicato socialista se convertiría en el necesario sujeto desmovilizador por antonomasia, y asimismo contribuiría, con sobrada energía, en la *guerra* como en la necesaria *derrota* de las Comisiones Obreras. Y está última, si era una condición objetiva improrrogable para garantizar el *éxito* del proyecto modernizador.

11.2.6.1. Sagunto y los Altos Hornos del Mediterráneo: éxitos y fracasos del «laboratorio de pruebas» de la política de reconversión industrial socialista

El final de primer trimestre de 1984 todavía iba a deparar más novedades en el campo laboral e industrial. Cuando la solución de los AHM de Sagunto se encontraba próxima, sin *solución de continuidad* desde el Gobierno se abriría un nuevo frente ya de forma decidida y sin los titubeos que había mostrando repetidamente: la reconversión naval⁴⁰³. Tras cerca de medio año negociando, el día 5 de abril se conocía que la UGT, una vez más, en solitario había llegado a un acuerdo con el Gobierno y los empresarios de cara a la citada reconversión naval. Cuando ni siquiera había finalizado el primer plazo inicial de negociaciones, la sola garantía de no rescisión de contratos y del derecho a los fondos de promoción de empleo serían suficientes para la central ugetista⁴⁰⁴. Días más tarde se lograría sumar a plan de bases de la reconversión a ELA-STV⁴⁰⁵.

Ni un día tardaría en llegar la respuesta. El mismo viernes 6 de abril se retomaban las movilizaciones a través de diversos encierros y multitudinarias asambleas⁴⁰⁶. Unas movilizaciones que venían de tiempo atrás, y que habían frenado en un inicial momento las iniciales pretensiones gubernamentales. En este nuevo frente de lucha se volverían a repetir los esquemas consabidos, aunque teniendo más que presente el *síndrome de Sagunto*.

Tampoco tardaría en llegar el correspondiente apoyo mediático a tal decisión gubernamental, en primer lugar, por parte de *El País*, aunque ahora en un tono crítico por la posible repetición de cercanos errores. Así criticaba en un duro editorial como en el documento, *Proyecto de bases para la reconversión del sector naval*, no dejaba de ser “un proyecto genérico y ambiguo que hasta recoge una cláusula en la que las partes aseguran que su firma no prejuzga su independencia y comportamiento futuro de las negociaciones”⁴⁰⁷. Por otro lado, desde *ABC* en otro editorial para la colección se llegaba a preguntar si “nos estaremos o no nos

La negociación colectiva a finales de marzo” (pp. 12-13); “7,76 por 100, subida media por trabajador” (p. 14) ambos en *Unión*, nº 51-52, (1984), “La cláusula de revisión se generaliza”, *Unión*, nº 53, (1984), p. 5.

⁴⁰³ Véase, de nuevo, Capítulo 7, nota 27.

⁴⁰⁴ Noticia, “Acuerdo de UGT, empresarios y Administración en el proyecto de bases para la reconversión naval”, *El País*, 6 de abril de 1984; y, Noticia, Rodolfo Serrano, “Finaliza sin acuerdo la última reunión negociadora de la reconversión naval”, *El País*, 10 de abril de 1984.

⁴⁰⁵ Noticia, “Administración, patronal, UGT y ELA-STV firman el acuerdo para la reconversión naval”, *El País*, 12 de abril de 1984. Meses más tarde, Noticia, “El Gobierno aprueba un decreto de reconversión naval cuya aplicación prevé conflictiva”, *El País*, 14 de junio de 1984.

⁴⁰⁶ Noticia, María José Porteiro, “Los trabajadores del sector de construcción naval realizaron diversos encierros”, *El País*, 7 de abril de 1984; Noticia, Concentración en El Ferrol”, *El País*, 10 de abril de 1984.

⁴⁰⁷ Editorial, “La hora de los astilleros”, *El País*, 20 de abril de 1984. En torno a la *sombra de Sagunto* se señalaba: «El largo conflicto de Altos Hornos del Mediterráneo se convirtió en una prueba para el conjunto de la reconversión industrial anunciada y provocó el continuo aplazamiento del saneamiento del sector astilleros».

estaremos pasando en nuestro coeficiente contestatario”. Su solución resultaba de una completa lógica: “el camino de protestar menos y trabajar más”⁴⁰⁸.

Los datos disponibles no dejaban muchas dudas. En marzo de 1984 se registrarían 302 huelgas, con más de 600.000 trabajadores implicados y más de un millón y medio de horas perdidas. “Estas cifras suponen –indicaba el informe de la CEOE correspondiente al citado mes– un notable incremento respecto al mes de marzo de 1983”. Un documento, además, que ya proporcionaba los datos comparativos de los primeros trimestres de ambos años: “En porcentajes, el número de huelgas registradas en el primer trimestre de este año, respecto al anterior, suponen un incremento del 262,05 por 100, y el de jornadas perdidas un 216,53 por 100”⁴⁰⁹.

Pero antes de volver a los despachos, a las salas de prensa... ¿qué sucedió finalmente con los AHM de Sagunto? ¿Hasta qué punto aquel *laboratorio de pruebas* ofreció resultados concluyentes sobre la capacidad de resistencia del movimiento obrero? Hasta el momento, en no pocas ocasiones, se ha empleado de forma reiterada el adjetivo “éxito” para definir los resultados de las diversas convocatorias de protestas. Así ha sido en el caso de Sagunto. Pero como veremos *el éxito* no conllevaría mayores victorias en el balance final negociador.

Durante la segunda mitad del mes de marzo y la primera quincena de abril se acelerarán los tiempos políticos con respecto al cierre definitivo del conflicto de los Altos Hornos del Mediterráneo. Cuando no habían pasado ni veinticuatro horas de la intervención de Felipe González en TVE, los trabajadores tratarían de recuperar los canales de negociación, aunque sin cumplir con la condición impuesta por la propia compañía: el cierre del horno alto número 2. Difícil papeleta, pues si se procedía a cerrar el alto horno se paraba la producción y se terminaba el conflicto; pero, al mismo tiempo, la propia empresa se negaba a hablar y menos negociar⁴¹⁰.

Da comienzo una semana entre 14 al 21 de marzo. Un tiempo en que cada una de las partes trataría de mover sin ficha sin romper totalmente la última frontera del diálogo. La guerra psicológica, a través de los medios de comunicación, es clave. Así por ejemplo, mismo miércoles 15 los trabajadores seguían asegurando que los hornos podían seguir funcionando todavía un mes más. Incluyo el presidente del Comité, Miguel Campoy, aseguraba que “no [se] descarta que la fábrica se pueda aprovisionar de carbón a espaldas de la empresa”.

A lo que se sumaba una *guerra psicológica* a la par que *estética*⁴¹¹. Por un lado, desde hacía meses las mujeres saguntinas en cada manifestación, en cada asamblea, vestían con camisetas negras con el dibujo de una calavera con trataban de manifestar como el cierre de los AHM, significaría la muerte de una región entera. En este entrecruce de mensajes, también se conocería un alarmante mensaje: el 15 de marzo el Conseller de Industria de la Generalitat Valencia, Segundo Bru, declaraba en un Pleno del Parlamento la posibilidad de los altos hornos estallarán por el bajo ritmo de funcionamiento. Si *utópica* era la posibilidad de que los trabajadores se auto-bastecieran de carbón, las declaraciones de Bru se realizaban sin ningún tipo de fundamento⁴¹².

⁴⁰⁸ Editorial, “Índice de protesta”, *ABC*, 26 de marzo de 1984. A continuación se señalaba: «[P]orque la protesta carece de un fondo razonable; en otros casos, la solución sólo puede llegar desde la aceptación por el Gobierno de los límites que la realidad impone».

⁴⁰⁹ Noticia, “Conflictividad”, *ABC*, 28 de abril de 1984.

⁴¹⁰ Noticia, Manuel Muñoz, “Los trabajadores de Sagunto insisten en negociar sin el cierre previo del horno alto número 2”, *El País*, 13 de marzo de 1984.

⁴¹¹ Noticia, Manuel Muñoz, “El comité de AHM afirma que los hornos pueden funcionar un mes”, *El País*, 15 de marzo de 1984.

⁴¹² Noticia, Manuel Muñoz, “El «conseller» de Industria de Valencia denuncia el riesgo de explosión en la siderurgia de Sagunto”, *El País*, 16 de marzo de 1984.

El viernes 16 los vecinos encerrados en el Ayuntamiento de la ciudad ponían fin al mismo, incluida su huelga de hambre que ya duraba 10 días, con el objetivo de propiciar un debate en TVE sobre el futuro de la industria saguntina⁴¹³. A pesar de las citadas *gestiones favorables*, las mismas no tendrían resultados prácticos. Cinco días después, el miércoles los trabajadores rechazaban el que se iba a convertir –ahora sí– en el ultimátum de la empresa para que se pararan los altos hornos. Así lo decidiría la asamblea por un alto porcentaje de votos⁴¹⁴.

Lo que viene a continuación durante los siguientes quince días es una *feroz ofensiva* por parte de la dirección de la empresa, y más tarde del propio Ministerio de Industria, que, paso a paso, finiquitará las resistencias pero sobre la unidad de los trabajadores frente a la Dirección.

En la misma portada del 22 de marzo de *El País* se informaba de la decisión de la dirección de la empresa de despedir al menos 160 trabajadores –hasta 200 trabajadores, se calculaba entonces– por motivos “desobediencia permanente” a lo que se había sumado “un notorio quebranto de la disciplina laboral”, tras la orden del 20 de febrero de apagar los altos hornos⁴¹⁵. Comienza la cuenta atrás. Frente a este desafío, por vez primera, en más de un año los trabajadores en referéndum decidirán *dar marcha* atrás en una decisión clave: apagar el alto horno número 2. Su capacidad de resistencia empezaría a resquebrajarse. Más aún: el viernes 23 de marzo el número de despedidos había alcanzado a 230 trabajadores. Una decisión apoyada por el Comité de la Empresa así como por las respectivas direcciones de las federaciones del Metal de UGT y CCOO⁴¹⁶.

Lo que sucede en la siguiente semana se puede resumir como toda una suma de debilidades por cada una de las dos partes enfrentadas: la dirección y los trabajadores. Tras iniciarse la paralización del alto horno número 2 –con toda su carga simbólica– el martes 27 la dirección de AHM anularía todos y cada uno de los despidos⁴¹⁷. Una situación intolerable para Industria que decide al día siguiente destituir fulminantemente al director de AHM, José María Lucía, aunque como también se indicaría dicha decisión había sido “consultada [...] al más alto nivel gubernamental”⁴¹⁸. No terminaría ahí la *purga* pues también por delante se llevaría a todos los miembros del equipo directo de los AHM⁴¹⁹. No cabía, a partir de ahí, mayores dudas sobre la firmeza con la que desde el Gobierno se pensaba finiquitar el problema de Sagunto.

En menos de quince días el citado *problema* quedaría resuelto. Asumido por parte de los trabajadores el cierre, tras lo que había acontecido los últimos días de marzo, era la hora de buscar las mayores contraprestaciones posibles, empezando por la búsqueda de alternativas de

⁴¹³ Noticia, Manuel Muñoz, “Finaliza el encierro de 11 personas en el Ayuntamiento de Sagunto”, *El País*, 17 de marzo de 1984.

⁴¹⁴ Noticia, Manuel Muñoz, “Los trabajadores de Sagunto deciden mantener funcionando el horno alto número 2”, *El País*, 22 de marzo de 1984.

⁴¹⁵ Noticia, Manuel Muñoz, “La dirección de AHM despide a los trabajadores que han incumplido las órdenes de cierre del horno alto número 2”, *El País*, 23 de marzo de 1984.

⁴¹⁶ Noticia, Manuel Muñoz, “Los trabajadores aprueban la paralización del alto horno número 2 de AHM de Sagunto”, *El País*, 24 de marzo de 1984.

⁴¹⁷ Noticia, Manuel Muñoz, “Los trabajadores de Sagunto iniciaron la paralización del horno alto número 2”, *El País*, 25 de marzo de 1984; Noticia, “Anulados por la Dirección los despidos de trabajadores en Sagunto”, *ABC*, 28 de marzo de 1984.

⁴¹⁸ Noticia, Alberto Valverde y Rodolfo Serrano, “El INI destituye al presidente de AHM y Ensidesa por levantar los despidos de Sagunto sin contrapartidas”, *El País*, 29 de marzo de 1984. Una pequeña biografía sobre el destituido y sus actuaciones al frente de AHM en, Noticia, Manuel Muñoz, “Las decisiones equivocadas”, *El País*, 29 de marzo de 1984. Días después, y cuando el conflicto se podía dar por concluido, los trabajadores realizarían un ‘pequeño homenaje’ a de Lucía. Noticia, “José María de Lucía”, *ABC*, 12 de abril de 1984.

⁴¹⁹ Noticia, “Probable cese de los equipos directivos de AMH y Ensidesa”, *El País*, 30 de marzo de 1984.

empleo⁴²⁰. ¿Hasta qué punto la concentración y demostración de fuerzas sería útil a la hora de negociar las posibles contrapartidas con el INI? No se tardaría mucho tiempo en conocer la respuesta. Tras varios días de intensa negociación, el miércoles día 4 de abril se alcanzaba un principio de acuerdo. Asumida la inevitabilidad del cierre –previsto para el día 1 de octubre de aquel mismo año– los representantes de los trabajadores habían conseguido evitar los despidos mediante suspensiones de contratos. Detalles relevantes aparte –jubilaciones, fondos de promoción de empleo...⁴²¹– la otra gran cesión por parte del INI sería garantizar la generación de más de 2.100 empleos entre 1985 y 1987⁴²².

La cuerda de la unidad entre todos y cada uno de los trabajadores se rompería a partir de entonces. Y se rompería, justamente, entre los fijos y los temporales –la clásica división entre *insiders* y *outsiders* que caracterizaría al mercado de trabajo tras la RET’84–. Pues en los acuerdos alcanzados en la madrugada del 3 de abril ya se establecían unas pobres condiciones para los eventuales. De tal modo, que el viernes 6 de abril, día de la convocatoria del referéndum se tendría que suspender la misma ante el continuado boicoteo de los trabajadores temporales. Un ejemplo, harto singular, de algunos de los porqués de la derrota histórica del movimiento obrero⁴²³.

El referéndum, finalmente, tendría lugar el día 10 de abril. Un día antes el lunes 9 la Asamblea de Trabajadores tras una votación había decidido excluir del citado referéndum a los eventuales, en una decisión que evidenciaba la ya extendida división entre los propios trabajadores. Pero tampoco entre los *insiders* había un homogéneo consenso. Los sectores más “radicales” de CCOO –lo que en la prensa se traducía como los grupos con “posturas políticas prosoviéticas” y “pequeños grupos trotskistas”– seguían manifestándose en contra del cierre⁴²⁴. “Los trabajadores de Sagunto aprueban el cierre de las instalaciones”, anunciaba *El País* en su portada del 11 de abril. 2.175 votos afirmativos, 1.033 negativos, 92 en blanco y 12 nulos sería el resultado. Se cerraba así uno de los mayores conflictos obreros de nuestra contemporaneidad⁴²⁵.

Lo que va a acontecer a partir de ahí, tras todo un años de grandes movilizaciones, resultará, ciertamente, menor en términos mediáticos, aunque no así en términos prácticos ya que todavía quedaban por cerrar no pocas cuestiones, entre las que estaba garantizar el cumplimiento de los compromisos alcanzados. Así tras ser ratificado los acuerdos por el INI el

⁴²⁰ Así el 31 de marzo declararía el representante de CCOO en el Comité de Empresa: «[E]n principio descartamos el cierre, pero la realidad es que estamos luchando contra un Gobierno, y son más poderosos los 10 millones de votos que los 4.000 trabajadores de AHM». Noticia, Manuel Muñoz, “El comité estudia proponer a los trabajadores que acepten el cierre de la cabecera de Sagunto”, *El País*, 1 de abril de 1984.

⁴²¹ Tan sólo en bajas incentivadas a petición de los propios trabajadores, el cierre de la cabecera costaría más de 1.000 millones de pesetas. Noticia, “Sagunto”, *ABC*, 5 de octubre de 1984.

⁴²² Noticia, Rodolfo Serrano, “Los trabajadores aceptan el cierre de la cabecera de AHM y el INI se compromete a colocar a 500 obreros excedentes”, *El País*, 5 de abril de 1984.

⁴²³ Noticia, Manuel Muñoz, “Los trabajadores eventuales de Sagunto boicotean el referéndum para cerrar las instalaciones de cabecera”, *El País*, 7 de abril de 1984. En aquel mismo periódico se publicaba un alarmante artículo firmado por Carlos Mendo denunciando la alta violencia –y por consiguiente su peligrosidad social– que estaba alcanzando la reconversión industrial. MENDO, Carlos, “Reconversión, piquetes y el imperio de la ley”, *El País*, 7 de abril de 1984.

⁴²⁴ Noticia, Manuel Muñoz, “Los trabajadores de Sagunto deciden que los eventuales no voten hoy en el referéndum”, *El País*, 10 de abril de 1984.

⁴²⁵ Noticia, Manuel Muñoz, “Los trabajadores de Sagunto aprueban por amplia mayoría el acuerdo con el INI sobre el cierre de la cabecera”, *El País*, 11 de abril de 1984.

12 de abril, en los días siguientes se conocerían los detalles de los grandes proyectos para sustituir la industria siderúrgica saguntina⁴²⁶.

Tras unos meses de una relativa tranquilidad a principios de octubre –fecha en que estaba previsto el cierre de la cabecera– Sagunto volvería durante unas semanas a la sección de Economía, Sociedad y Trabajo de los grandes medios. Pronto los trabajadores denunciarían las ilegalidades cometidas por el INI en torno al ERE de cara al cierre definitivo. Además del retraso con que se presentaría a los trabajadores el citado expediente de regulación, tal hecho, llevaría a retrasar unos días todavía más el cierre previsto para el primer día de octubre. Lo anterior generaría no pocas desconfianzas ante la posibilidad de que lo acordado en abril finalmente no se cumpliera⁴²⁷. A partir de ahí tendría lugar el último acto de negociación-presión-negociación aunque ya sin grandes asambleas, sin grandes manifestaciones, sin grandes sobresaltos⁴²⁸.

En cualquier caso, aquel último proceso duraría poco: el día 6 de octubre se procedía a cerrar la cabecera tal y como anunciaba nuevamente en su portada *El País*⁴²⁹. Tras aceptarse en referéndum el Fondo de Promoción de Empleo, el último día de trabajo para los *fijos* sería el mismo 31 de diciembre de 1984. El dos de enero de 1984, más de 1.300 trabajadores entraban en el citado Fondo de Promoción de Empleo⁴³⁰.

En el terreno de las interpretaciones, tras lo visto en las páginas anteriores, resulta del todo significativo el nuevo consenso mediático a la hora de “celebrar” el cierre de los AHM. Tanto *El País* como el *ABC* –por más que desde la derecha se hablará, en adelante, de los “parados de lujo” en relación a los trabajadores de Sagunto⁴³¹– elogiarían el final del citado conflicto sin grandes disimulos. A lo que se sumaría la satisfacción del Gobierno⁴³².

Incluso el propio *El País* se adelantaría a las celebraciones dos días antes de conocerse los resultados del citado referéndum del 10 de abril. Señalaría así en un editorial del 8 de abril, como “no obstante [...] queda la pregunta de si un acuerdo como el alcanzado el miércoles no

⁴²⁶ Noticia, “La comisión ejecutiva del INI ratifica el acuerdo de AHM”, *El País*, 13 de abril de 1984; Noticia, Jaime Millás, “Aprobados 12 nuevos proyectos de inversión en Sagunto”, *El País*, 14 de abril de 1984; Noticia, Carlos de Miguel, “Solchaga última la instalación en Sagunto de una fábrica de vidrio”, *ABC*, 10 de octubre de 1984.

⁴²⁷ Noticia, “La cabecera de Altos Hornos de Sagunto no se cerró ayer, como estaba previsto”, *ABC*, 2 de octubre de 1984; Noticia, Manuel Muñoz, “AHM presentó el expediente de regulación de empleo para más de 1.800 personas”, *El País*, 2 de octubre de 1984. En un artículo aparecido en *ABC* al día siguiente y firmado por José Luis Carrascosa se señalaba: «Ahora viene lo peor. Aún no se ha dado fin al cierre de Sagunto y el Gobierno está convencido de que la siderurgia integral será una broma en materia de conflictividad, comparada con la reconversión de los astilleros [...]. Según cálculos del Ministerio de Economía el conjunto de los sectores en crisis –básicamente siderurgia y naval– han requerido ayudas a fondo perdido que superan el medio billón de pesetas, cifra que, en inversión productiva, representaría la creación de unos 125.000 empleos nuevos, justo el doble de los que desaparecen en el conjunto de la reconversión». CARRASCOSA, José Luis, “Uno por dos”, *ABC*, 3 de octubre de 1984.

⁴²⁸ Noticia, Manuel Muñoz, “La dirección y los trabajadores de AHM se reunirán de nuevo hoy en el Ministerio de Trabajo”, *El País*, 4 de octubre de 1984; Noticia, “El comité de AHM se encerró anoche por la falta de acuerdo sobre el expediente de Sagunto”, *El País*, 5 de octubre de 1984.

⁴²⁹ Noticia, “La dirección de AHM ordena el cierre definitivo del horno alto y la acería de Sagunto”, *El País*, 6 de octubre de 1984; Noticia, Manuel Muñoz, “Los trabajadores de Sagunto ejecutan normalmente el cierre de la cabecera”, *El País*, 7 de octubre de 1984.

⁴³⁰ Noticia, Jaime Millás, “Los trabajadores de AHM aceptan el fondo de promoción de empleo”, *El País*, 22 de diciembre de 1984.

⁴³¹ CARRASCOSA, José Luis, “Tarde y mal”, *ABC*, 11 de abril de 1984.

⁴³² Véanse algunas de las reacciones en: Noticia, Miguel Ángel Villena, “Las fuerzas políticas y sociales de Valencia valoran positivamente la votación en AHM”, *El País*, 12 de abril de 1984.

hubiera sido posible, con un menor coste social, hace un año”. Y añadía a continuación: “Todas estas posibilidades de arreglo, previsiblemente, se conocían hace un año; cuando menos, parecería una grave irresponsabilidad que se hubiera planteado la reconversión de AHM sin haber cuantificado a la vez el impacto sobre las actuales plantillas y las previsiones de empleo”. Pero lo más grave no quedaba ahí para el periódico que había dedicado, al menos, media docena de sus titulares al asunto: “Durante los últimos 13 meses se ha resentido la autoridad y la credibilidad de un Gobierno que amenaza sin cesar, y sin cumplir nunca sus amenazas”. Dicho esto, parte de la responsabilidad la hacía recaer exclusivamente en CCOO, aunque en aquella ocasión no hubiera existido diferencias enfrentadas con la UGT: “CCOO ha mantenido una postura a ultranza del mantenimiento de la cabecera, aun sabiendo que la decisión de cierre era irreversible, y todo indica que en la base de esta posición anidaban interés más políticos que sindicales: más de combate al Gobierno que de defensa de los trabajadores”. O dicho con las siempre palabras refinadas de ABC: se acusaba, ni más ni menos, que a Comisiones Obreras de realizar *huelgas políticas*. Y frente a los enemigos del Gobierno, del sistema en su conjunto, volvía a resaltar el papel ejemplar de la UGT, a quien se la calificaba como la “organización que mayor serenidad ha demostrado en todo el proceso”⁴³³.

9 huelgas generales, 24 huelgas de fábrica, 11 manifestaciones en Valencia o 7 marchas a Madrid es tan sólo parte del balance de las movilizaciones llevadas a cabo por los trabajadores y vecinos de Sagunto, entre febrero de 1983 a diciembre de 1984. Dicho esto, ¿existió alguna vez la posibilidad de que el Gobierno diera marcha atrás? Por más que se ganarán posiciones en una batalla a largo plazo, de que no faltarán los *golpes de efecto*, la respuesta es no. Convertido en el gran laboratorio de pruebas del proyecto de modernización socialista, la sola posibilidad de ceder en aquel mismo terreno hubiera sido tanto como cuestionar la tesis de la *única política posible*. El mejor ejemplo lo encontramos en cómo no se llegaría a examinar el plan de viabilidad presentado por el propio Comité de Empresa.

En el terreno de los balances, la *tesis de la derrota* del movimiento obrero español en el último tercio del siglo XX, se verifica a grandes rasgos. Más allá de la acusación derechista y populista de que los trabajadores de Sagunto se convirtieran en *parados de lujo*, aquello más que una victoria sería una derrota limitada, en tanto no se conseguiría frenar el cierre de la cabecera. Pero, ahora bien, ¿sirvió para algo aquella denodada lucha?

La pregunta no es baladí cuando se enfoca desde diferentes ángulos. Junto con Euskalduna aquel mismo año, los sucesos de Reinosa tres años después o inclusive las *Marcha del Acero* o los propios sucesos de Cartagena –estos dos últimos ya a principios de los noventa– los mismos forman parte de los últimos capítulos de *resistencia numantina* por parte de un viejo movimiento obrero. A lo que había que sumar como, en suma, CCOO actuaría como una “fuerza de resistencia parcial” en todo este largo I Trimestre⁴³⁴. Y lo cierto, es que en ninguno de los casos citados se conseguiría frenar el cierre de las empresas o los procesos de reconversión en marcha. O dicho de otra forma: la *actitud defensiva* del movimiento sindical no se traduciría en resultados palpables frente a la “política de desmovilización” del Ejecutivo, como advertiría Soto Carmona. A lo que se sumaría como “la pasividad social, el cansancio y el

⁴³³ Editorial, “Un acuerdo tardío”, *El País*, 8 de abril de 1984. También el día 8 ABC llevaba a su sección de opinión un duro editorial contra el *sindicato comunista*, aunque no tuviera relación directa con el caso de Sagunto en esta ocasión. Tras acusar tanto a CCOO como a UGT, en gran medida, de la situación de desempleo que sufría el país, se hablaba en los siguientes términos: «En cualquier caso, hubo un sobreconsumo de libertad sindical. Sobreconsumo cuyas cuentas están hoy traducidas en las cuentas y en los números del paro». Lo que a su vez llevaba a destacar, sin tapujos, el peligro comunista: «Comisiones Obreras cubre con su dureza actual una clara diversidad de propósitos extralaborales. Juega, frente a UGT, a favor de Corriente, y en contra de las conveniencias reales de los trabajadores españoles». Editorial, “Sindicalismo comunista”, ABC, 8 de abril de 1984.

⁴³⁴ ALONSO, Luis Enrique, “Conflicto laboral y cambio social” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales...*, op.cit., p. 406.

fracaso del «cambio», alejó cualquier posibilidad de dar una salida «socialmente justa» a la crisis»⁴³⁵.

Y, sin embargo, el caso de Sagunto va mucho más allá de lo que sucedió en 1983 y 1984. Nos movemos también aquí en el terreno de la simbología, en el de ética de defensa del derecho del trabajo de una comarca entera. De esta forma, si para el Gobierno los AHM se terminarían transformando en un pequeño-gran problema en donde a la suma de incapacidades, se añadiría la suma de indecisiones, para finalmente llegar a un acuerdo de mínimos-máximos; de cara al conjunto de la clase obrera –que todavía guardaba un recuerdo vivo de lo que había acontecido durante los años de la transición– Sagunto llegaría a representar la imagen viva de resistencia de un *nuevo-viejo* movimiento obrero. Pero no sólo, pues iría un paso más allá: también representaría la capacidad de *resistencia* frente al poderoso y prepotente Gobierno socialista. Todo ello en base al recurso más potente del movimiento obrero: la *solidaridad como motor* de las movilizaciones.

Más allá del cauteloso cuando no sospechoso silencio que sobre este tiempo suelen guardar las grandes narraciones, la capacidad y trascendencia simbólica de Sagunto no puede minusvalorarse. A todo lo anterior, además, debe añadirse otra cuestión no menor: la unidad de acción de CCOO-UGT tanto dentro como fuera del Comité de Empresa, por más que a última hora, en parte, la misma estallar por los aires. Igualmente, también se ha de tener muy presente el *papel decisivo de la asamblea* junto con el apoyo decidido de un pueblo entero, que terminaría desbordando el orden político local establecido⁴³⁶.

Pese a todo, y por más que aquella lucha sostenida en el tiempo sirviera de ejemplo de cara al exterior y a la par que modificará los hábitos de vida de una comunidad obrera entera⁴³⁷, tan sólo se conseguiría frenar los efectos más perversos de la lógica modernizadora socialista. A lo que ha de añadirse como para los propios trabajadores implicados en aquel final, la lucha seguida durante meses tendría enormes consecuencias a nivel personal, a nivel psicológico como a nivel de la vida diaria⁴³⁸.

Por lo demás, los AHM de Sagunto, marcarían, un antes y un después, en muchos sentidos. Convertido en referente –cuando no en un *mito*– su capacidad de simbolismo estaría presente no sólo en las asambleas, en las barricadas, en las manifestaciones, sino muy especialmente en las estrategias gubernamentales y en las líneas editoriales del *ABC* y *El País*.

Ahora bien, ¿qué pasaría más allá de abril de aquel mismo año? A pesar del descenso de conflictividad así como del cierre de fuertes conflictos, la segunda parte de aquel accidentado año estaría marcada, principal aunque no únicamente, por la reconversión naval. Una reconversión que se llevaría la vida de dos trabajadores al menos, a lo que habría que sumar centenares de heridos muchos de ellos de bala.

⁴³⁵ SOTO CARMONA, Álvaro, “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)” en RUIZ, David (dir.), *Historia de Comisiones*

⁴³⁶ Sobre el papel decisivo de los trabajadores, léase con atención el relato de Ángel Núñez miembro del Consejo de la Unión Comarcal del Camp de Morvedre sobre el significado y dimensiones que alcanzaría la lucha solidaria de los trabajadores y vecinos de Sagunto: NÚÑEZ, Ángel, “Puntualizaciones en torno a Sagunto”, *El País*, 9 de octubre de 1984.

⁴³⁷ Resulta de enorme interés el retrato que planteara el periodista Manuel Muñoz sobre los cambios de hábitos de vida en Sagunto. durante todo este tiempo a la altura de abril de 1984: Noticia, Manuel Muñoz, “El conflicto de Altos Hornos del Mediterráneo ha introducido profundos cambios en la vida cotidiana de los saguntinos”, *El País*, 26 de marzo de 1984.

⁴³⁸ Léase atentamente, Noticia, Manuel Muñoz, “El fin de la resistencia saguntina”, *El País*, 9 de octubre de 1984. Se decía en aquel texto entre otras muchas cuestiones: «Y el sentimiento más extendido, también entre el pueblo, es el de impotencia. Los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo esta vez no han podido resistir, no han podido desobedecer las órdenes de la dirección porque no había carbón ni mineral».

Pero ante todo Sagunto supondría un inmenso campo de aprendizaje para el Ejecutivo, tanto en relación a la represión del movimiento obrero como a los canales de fabricación de consensos, de cara a la legitimación del modelo de producción dominante, del *Sistema* en su conjunto. De aquel *laboratorio de pruebas*, por tanto, se extraerían no pocas enseñanzas –más allá de mejorar en el manejo de los recursos mediáticos públicos– de cara al siguiente gran desafío: la reconversión naval, cuyos primeros pasos ya se han apuntado. A partir de entonces, y en primer lugar, se optaría por *dulcificar el mensaje reconversor*. O cuanto menos se presentaría de forma menos brusca, menos prepotente. En segundo término, el *final* de Sagunto reforzaría las tesis del equipo económico de Boyer, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Lo que tendría una traducción en términos económicos: se acentuaría la *dirección* y el *contenido* de la política económica liberal⁴³⁹. Y, por último, vistos los resultados Felipe González se implicará más y con mayor profundidad en la primera línea de la política económica de cara a “lavar” la imagen del propio Gobierno⁴⁴⁰. Sumado a otro objetivo: romper con la creciente sensación de falta de una política informativa⁴⁴¹.

Gracias a este “proceso de aprendizaje” la *narración socialista* iría ganando enteros. Así mientras que tanto desde el Partido como desde el Gobierno se trataría de ningunear la importancia de las movilizaciones habidas, no se dejaría de insistir en el único camino posible sin mayores contemplaciones. El socialismo ganaba así en capacidad de dar respuestas a la realidad económica, aunque perdía enteros en capacidad de respuesta social⁴⁴². Asimismo en el ya clásico intercambio de papeles entre los políticos y técnicos socialistas, González empezaría, inclusive, a reconocer errores, aunque sin cuestionar la dirección liberal. Algo inédito, aunque ahí mismo concluyeran posibles cambios de rumbo tras dos grandes experiencias que la política del Poder le había proporcionado desde diciembre de 1982 en caso de *no pactar*: el *non nato* AI’84 y el caso de Sagunto.

De esta forma, a la hora de afrontar la *reconversión naval* se contaría ya con un bagaje no despreciable y con una cierta flexibilidad, sumada a los pequeños y limitados cambios estéticos-simbólicos en la política informativa. Aunque el esquema de actuación se repitiera a grandes rasgos –anuncio del Gobierno, pacto con UGT, oposición de CCOO, movilizaciones

⁴³⁹ Un dato a tener en cuenta: a partir de aquellos momentos destacados miembros del PSOE de forma pública participarían en la Comisión de la Trilateral. Noticia, “Miembros del PSOE en la Trilateral”, *ABC*, 1 de abril de 1984. Véase aquí el aclaratorio trabajo de, ESTEFANÍA, Joaquín, *La Trilateral Internacional del...*, *op.cit.*.

⁴⁴⁰ «El presidente no ignora que difícilmente puede, en ese caso, zafarse del papel de malo, por la sencilla razón de que el Estado es el propietario. La imagen del Gobierno como un empresario tenaz enfrentando a sus trabajadores es inevitable, sobre todo –en referencia directa a CCOO– cuando algunos sindicatos entienden que negociar sólo sirve para preguntar la cifra de excedentes de plantilla, pintar la pancarta y salir inmediatamente a la calle». CARRASCOSA, José Luis, “Reconversión y degaste”, *ABC*, 28 de abril de 1984.

⁴⁴¹ En un editorial de *ABC* de principios de abril –y cuando en parte se había cerrado *filas* en torno a la política económica del Gobierno– se indicaba: «Desde hace un año, el presidente da la sensación de encerrarse en su palacio, de rehuir el debate para refugiarse en conversaciones oficiales [...] Tampoco así se puede gobernar en una democracia europea». Editorial, “Rehuir el parlamento”, *ABC*, 7 de abril de 1984.

⁴⁴² Entre el rosario de ejemplos nos conformamos con los dos siguientes: Noticia, “La recolocación en los sectores en reconversión no se puede mantener, según Carlos Solchaga”, *El País*, 19 de marzo de 1984; Noticia, Gustavo Matías, “Boyer anuncia que en ningún caso serán modificados los objetivos monetarios y financieros del Gobierno”, *El País*, 18 de febrero de 1984. Incluso en aquella fecha, cuando ya era un hecho de no se cumpliría la previsión gubernamental, Boyer lanzaba una dura advertencia basada en la *fe* en la más estricta ortodoxia neoliberal: «Ya la propia evolución económica castigará: si aumentan más los sueldos, habrá menor autofinanciación de las empresas, menos exportaciones y más paro. Y estos son castigos, a los empresarios y a los trabajadores». Véase también, Noticia, “Los incrementos salariales no exigen variación en la política monetaria del Gobierno”, *El País*, 6 de abril de 1984.

obreras con amplio apoyo social más la posterior radicalización...– no se volvería a alcanzar la situación de emergencia social de principios de los 1984.

Los socialistas demostrarían, desde entonces, ya un amplio manejo de los mecanismos de consenso –política informativa más adaptada al terreno, junto con un uso más inteligente de los procesos de deslegitimación de las organizaciones obreras– pero sobre todo se mostrarían más firmes, más contundentes, en el empleo de los mecanismos de dominación –a saber mayor uso y con más brutalidad de los cuerpos de seguridad del Estado–.

12. La «necesidad hecha virtud»: el difícil parto del Acuerdo Económico y Social (febrero 1984-diciembre 1984)

Desde las calles, los centros de trabajo, las fábricas se regresa ahora a las salas de reuniones, a los despachos, a las intrigas palaciegas... de cara a examinar los últimos episodios históricos que darían forma y contenido completo a la primera gran reforma del mercado de trabajo en la época socialista. A saber, nos detendremos en los diferentes pasos negociadores tras el cual se presentará el Acuerdo Económico y Social. El primer y último gran acuerdo social de la época socialista.

Con el análisis del citado AES así como del desarrollo reglamentario de la RET'84 concluye esta larga investigación así como nuestro estudio de caso. Quedan, por tanto, expuestas las bases político-institucionales y, en concreto, los mecanismos jurídicos que darían lugar, a corto-medio plazo, a la formación histórica de la “cultura empresarial de la precariedad”.

Precisamente, la historia del AES y todo los intereses políticos como económicos que le rodearon, posibilitarán, además, interpretar el valor histórico y político otorgado al mismo por los múltiples actores en juego. En tanto, permitiría al primer Ejecutivo socialista concluir su intensa agenda reformista inicial y finalizar, con una relativa tranquilidad, su primera legislatura.

12.1. De vuelta a los despachos: el largo preámbulo de la reconstrucción del fallido diálogo social (febrero-julio 1984)

«El Gobierno está dispuesto a negociar todo, siempre que no se distorsione la política económica».

«El sistema capitalista es el menos malo, es el que mejor funciona».

Declaraciones de Felipe GONZÁLEZ a los periodistas laborales y a los empresarios los días 29 de marzo y 26 de abril de 1984, respectivamente¹.

Cuatro días antes de intervenir ante el Grupo Parlamentario Socialista, el Presidente del Gobierno, el jueves 16 de febrero –dentro de lo que hemos denominado como la 1ª *fase de reacción* ante la conflictividad obrera del I Trimestre de 1984– se filtraba a la prensa como el mismo González tenía ya por intención la apertura de negociaciones para un gran pacto social². Aunque aquel mensaje no dejaba de ser demasiado genérico se constituiría en la primera pequeña-gran señal de que algo se estaba moviendo. Inclusive se hablaba de la posibilidad –lejana en todo caso– de revisar las posturas acerca de la política salarial, “acercándolas más a la de UGT”. Tampoco faltaba el mensaje de cara a la patronal: “podría estudiarse la reivindicación de los empresarios en cuanto a disponer de más dinero para el sector privado”. Igualmente, también se constituiría en el primer llamamiento oficial/institucional de lo que se meses tarde se convertiría en el AES. Como asimismo se sabría que las reuniones entre la UGT y la CEOE se

¹ Noticia, Mariano Guindal, “El Gobierno está dispuesto a negociarlo todo, mientras que no se distorsione la política económica”, *La Vanguardia*, 30 de marzo de 1984; Editorial, “González y el capitalismo”, *ABC*, 27 de abril de 1984.

² Una demanda cada vez más extendida entre las *voces hegemónicas* de la derecha política y económica: «El pacto social ha sido, por otra parte, demandado desde diversos sectores. El catedrático Enrique Fuentes Quintana se refirió hace unos días a la conveniencia de la misma y el presidente del Banco de Bilbao, José Ángel Sánchez Asaín, en una carta dirigida a los accionistas de la entidad, señalaba que ‘sin un gran pacto entre los agentes sociales [...] va a ser muy difícil superar con éxito las dificultades de nuestra economía’». Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno convocara a patronal y sindicatos para iniciar las negociaciones de un nuevo pacto social”, *El País*, 17 de febrero de 1984.

habían mantenido a su ritmo habitual, a pesar de los últimos desencuentros de enero y el desmentido del propio *sindicato socialista* por aquellas fechas³.

Vuelta a empezar, prácticamente, desde 0. Así pues, se iniciaría, otra vez más, el intercambio de opiniones vía prensa, vía declaraciones, vía entrevistas. Tan sólo dos días después –en concreto, el domingo 19 de febrero– *El País* publicaba una larga como reveladora entrevista con un desanimado Nicolás Redondo. Allí ya se hablaba claramente de no pequeñas diferencias con el Gobierno –contratación temporal, Presupuestos Generales del Estado pero especialmente con el Decreto-Ley de reconversión– empezando por la crítica al concepto de la “única política posible”: “Hasta ahora sólo hemos oído un solo discurso, un solo mensaje, excesivamente económico y tecnocrático”.

En lo que calificaba como una clara “subestimación del hecho sindical” –añadiendo, “en ocasiones hemos tenido la sensación de que se nos ha tenido en cuenta, en la medida en que somos una parte importante de la familia socialista”– en todo caso se podían localizar en las palabras del Secretario General de UGT su siempre predisposición por “la concertación. Hay que retomar ese tema”. Todavía más, pues pese a la experiencia del *non nato* AI’84⁴ y del cruce de acusaciones y de las amenazas del Equipo Económico de Boyer, y de denunciar que se “tenía que haber sido más sensible a este sacrificio”; añadiría: “[e]stamos, incluso, dispuesto a negociar la subida salarial del 6,5 en las empresas públicas”. Ahora bien, tampoco faltarían las críticas ante los problemas de *entendimiento* con los ministros económicos, empezando por Almunia: “Yo no hablo de confianza, pero lo que sí es cierto es que no exista esa fluidez que tendría que haber. Yo no tengo nada contra ningún ministro”. En cualquier caso, la UGT también se mostraba solícita a seguir actuando de apagafuegos: “La situación de CCOO puede llegar a ser irreversible, y sus posturas le pueden llevar a alinearse con grupos minoritarios y radicalizados [...]. No podemos ahora caer en el asamblearismo”⁵.

En una composición escenográfica cada mejor más perfecta y por tanto más coordinada en la sucesión de las respectivas como esperables actuaciones, en paralelo, a los primeros conatos de preparación de la negociación de un futuro acuerdo social, se sucedería una *brutal* campaña de deslegitimación política de CCOO, identificada ya en la prensa diaria –como venía sucediendo desde hacía meses en *El Socialista* o *Unión*– como el principal enemigo a batir. El motivo tantas veces argumentado: ante la falta de una oposición política real, Comisiones Obreras había asumido este *papel*. Una campaña que se convertiría en una constante de la vida

³ Véase, en primer lugar, lo apuntado en, “11.2.4. Comisiones Obreras en primer línea: del estadillo de la «alarma social» a la elaboración de la respuesta política, jurídica y policial-militar (febrero 1984)”. Por lo demás, en aquellas mismas fechas se comenzaba a intuir ligeros cambios de posición estratégico-política por parte de algunos miembros del Gabinete: «Miembros del Gobierno, por su parte, se han mostrado favorables a intentar reconducir nuevamente todo el tema de la concertación, aunque ello suponga hacer concesiones en materia económica». Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno convocara a patronal y sindicatos para iniciar las negociaciones de un nuevo pacto social”, *El País*, 17 de febrero de 1984.

⁴ Sobre esta misma cuestión se indicaba: «Todavía no tenemos una idea muy clara de que por qué no habido acuerdo salarial. Yo creo que se ha dado una cerrazón por parte de la CEOE exigiendo cosas que UGT no podía aceptar, como la revisión salarial a los 12 meses. Y creo, también, que ha habido un comportamiento muy poco claro por parte de algunos miembros del Gobierno». Entrevista, “Nicolás Redondo”, *El País*, 19 de febrero de 1984. Días después Felipe González declararía en una conversación en APIL lo siguiente: «Respecto a la ausencia de un marco para la negociación salarial de 1984 preciso que ello tiene tres consecuencias. Primero, el efecto psicológico negativo sobre la mayoría de los empresarios y trabajadores que desean acuerdos. Segundo, el incremento de la conflictividad laboral, especialmente en el sector público. Y, por último, una posible revisión de los sueldos al alza que puede provocar el endurecimiento de la política monetaria, con las consiguientes repercusiones en el empleo». Noticia, Vicente Clavero, “Felipe González reconoce un retraso en la creación de empleo, respecto a lo previsto”, *ABC*, 30 de marzo de 1984.

⁵ Entrevista, “Nicolás Redondo”, *El País*, 19 de febrero de 1984.

política durante aquel largo año 1984, pero que ya venía precedida de no poco otros antecedentes similares.

Pero más allá de las declaraciones del propio González ante el GPS, que ya viéramos, también se conocería el día 22 de febrero la reunión que se había mantenido al más alto nivel entre el Gobierno –González, Boyer, Solchaga y Almunia– y UGT –Redondo, Corcuera y Zufiaur– para tomar el pulso a la situación. Recuérdese que, a partir de entonces, la UGT iniciaría un proceso de desconvocatoria de conflictos abiertos y de firma acelerada de *convenios a la baja*⁶. No obstante, en el citado encuentro –por lo que más tarde se supo– la UGT se mostraría menos confiada ante las peticiones y promesas del Ejecutivo, pero sobre todo de seguir actuando de *apagafuegos*. No eran pocas las heridas abiertas –algunas de ellas de cierta profundidad– para que con tan sólo unas buenas palabras por parte del Presidente todo quedara solucionado y olvidado⁷.

En cualquier caso, el mensaje de González Márquez no dejaba de constituirse en un singular como paradójico llamamiento a un nuevo *pacto social* en un momento de alta conflictividad laboral y social. Prácticamente descartadas las Comisiones Obreras cuando no directamente atacadas, vilipendiadas y criminalizadas; UGT, PSOE y Gobierno –por este orden– venían a coincidir en esta política de ataque sistemático, al que pronto se sumarían los correspondientes editoriales⁸ y artículos de opinión⁹ del principal medio de comunicación de la nación. También por estas vías quedaban evidenciados los objetivos de la *1ª fase de reacción* por parte del Ejecutivo que a la par que hablaba de la paz social, criminalizaba al principal sujeto político opositor. Por cierto aquella nueva campaña de acoso –cuyas dimensiones se iban a radicalizar gravemente en el mes de octubre al albur de la negativa de CCOO a firmar el AES– llegaría a tales extremos que Julián Ariza en un artículo de opinión en *El País* preguntaría de forma retórica: *¿Piensa ilegalizarnos, señor presidente?*¹⁰ Un texto precedido de

⁶ Noticia, “Felipe González, preocupado por el aumento de la conflictividad laboral”, *ABC*, 22 de febrero de 1984; Noticia, “Felipe González, dispuesto a ceder a las presiones de UGT sobre la reconversión”, *ABC*, 22 de febrero de 1984; Noticia, “González acusa a CCOO de estar preparando la huelga general y muestra su inquietud por la conflictividad laboral”, *El País*, 22 de abril de 1984.

⁷ «UGT ha optado por esperar a que el gesto del presidente González propiciando el encuentro del lunes se vea refrendado por los hechos, antes de comprometerse en ningún sentido. Tampoco consiguió el presidente que las asperezas registradas entre líderes sindicales y miembros del Gabinete se resolvieran por completo en el transcurso de la cena celebrada en la Moncloa [...]. Y es público que Nicolás Redondo hace meses que no habla con determinados ministros...». Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT no quiere asumir ningún compromiso con el Gobierno hasta que los hechos, no refrenden el espíritu de negociación”, *El País*, 23 de febrero de 1984.

⁸ En un ya comentado editorial del jueves 23 de febrero –justo después de las declaraciones de Felipe González y de conocerse los pormenores de la reunión entre Gobierno y UGT– *El País* llegaría a hablar de la ‘guerra sindical’ desatada por parte de las Comisiones Obreras. Editorial, “El diálogo y el rodillo”, *El País*, 23 de febrero de 1984.

⁹ Joaquín Leguina llegaría a escribir en *El País* en referencia a la estrategia de CCOO el mismo 22 de febrero: «Nadie que entienda un mínimo de asuntos electorales llega a la conclusión de que subiéndose a todos los caballos desbocados y a golpe de asamblea va a llegar ningún partido a ganar terreno electoral significativo; lo más que puede conseguir es deteriorar al Gobierno actual y, lo que es más grave, la convivencia civil en beneficio de la derecha». LEGUINA, Joaquín, “¡Por fin! La huelga nacional política”, *El País*, 22 de febrero de 1984.

¹⁰ Para el dirigente comunista aquella campaña ‘anticomunista’ tenía un objetivo claro de denuncia: «CCOO bordea la Constitución, fomenta el desastre de la economía, hace crecer el paro [...], y, en suma, constituye un peligro la paz social, la estabilidad de la democracia y la superación de la crisis económica. Ya menudean las multas, detenciones y procesamiento de algunos de nuestros militantes». El autor que se remontaba en el tiempo a la hora de abordar las causas de esa campaña de criminalización, no dudaba en señalar, primero, como se trataba de «suprimir a CCOO del mapa sindical» de cara a favorecer la hegemonía de UGT, lo que garantizaría «consolidar el modelo político dibujado el 28-0». Aplicando el *zoom de clase* seguía indicando el carácter claramente neoliberal de la política económica

un contundente comunicado desde la dirección del sindicato, en donde se pedía el “cese [por parte del Gobierno] de su discriminación en sus relaciones con los sindicatos, arbitrarias y unilaterales”¹¹. Así estaban las cosas, cuando ni siquiera había finalizado el mes de febrero. En esas mismas fechas no sólo se conocerían las elevadísimas cifras de la conflictividad laboral alcanzada, sino también el incremento del paro en cerca de cien mil personas

Durante los dos siguientes meses –marzo y abril de 1984– e inaugurada la primavera, se asistiría a una larguísima toma de posiciones, en torno a la propuesta de un posible y futurible *pacto social*, con dos muy importantes novedades. Primero, la radicalización política, ideológica y discursiva del presidente Felipe González, hasta finiquitar entonces cualquier veleidad socialdemócrata; y, en segundo lugar, reaparece en el escenario como sujeto político de primer orden el PSOE, como *partido*, en el proceso de toma de contacto entre las fuerzas políticas y los agentes sociales.

En marzo, a nivel político, a nivel negociador, empezaría con las primeras noticias del inicio del debate parlamentario sobre la reforma del mercado de trabajo. Por cierto, la RET’84 no levantaría grandes pasiones parlamentarias ni grandes atenciones mediáticas, hasta el punto de que su *rastró* en la prensa es, sencillamente, insignificante¹². De hecho, cuando la primera vuelta de la negociación parlamentaria sobre la RET’84 estaba avanzada, se tendría que suspender un debate en el Pleno del Congreso por falta de *quórum*¹³.

Igualmente también estaría marcado aquel mes –como hemos visto– por la intervención del presidente del Gobierno en TVE. “[E]n el mensaje del presidente parecía haber una parte dirigida a CCOO y nos decía que no habría negociación si no se partía previamente de la política económica del Gobierno. Felipe González se confundió de sindicato”, sentenciaba Marcelino Camacho en una entrevista en *El País* a los pocos días de la *famosa* comparecencia televisiva. Por si quedaban dudas añadía: “Nosotros no atacamos al Gobierno, defendemos a los trabajadores. Y estamos por la negociación, porque no somos ni unos locos ni unos

gubernamental. «La realidad es que nos oponemos a la política económica del Gobierno sencillamente porque se parece como una gota de agua a otra gota de agua a la política antisocial y reaccionaria que la derecha considera más idónea para el tratamiento de la crisis». Sin dejar pasar la oportunidad de criticar el pactismo y secretismo entre UGT y el Gobierno, concluía: «Vamos reafirmando en que la movilización de los trabajadores en defensa de sus aspiraciones y reivindicaciones exige un esfuerzo permanentemente de explicación, de participación, de paciencia, de militancia, de claridad en los objetivos, de evitar fugas adelante y los frenos que buscan impedir la lucha, de ir acumulando fuerzas consiguiendo conquistas parciales, aunque sean modestas [...]. Tampoco nos vamos a entregar a los cantos de la sumisión ni vamos a avalar directa o indirectamente una política como la seguida por el Gobierno». ARIZA, Julián, “¿Piensa ilegalizarnos, señor presidente?”, *El País*, 1 de marzo de 1984.

¹¹ Noticia, “CCOO interpreta las acusaciones como un acoso al sindicato”, *El País*, 23 de febrero de 1984.

¹² Noticia, Rodolfo Serrano, “Rechazada una enmienda la totalidad de la reforma del Estatuto de los Trabajadores”, *El País*, 2 de marzo de 1984. Se comentaba allí mismo: «A pesar de todo, y salvo ligeros chispazos, el pleno se desarrolló en un tono menor y no fue capaz de reproducir el amplio debate registrado durante su negociación entre los sindicatos y los empresarios. Tal y como se desarrolló la sesión y a la vista de las actitudes de los parlamentarios, parece que el tema de la contratación temporal, que provocó la inquietud y el temor entre los trabajadores a la flexibilización de las plantillas no despertó el mismo interés en la Cámara de los Diputados». Por lo demás, véase lo apuntado en el Capítulo 11, *nota* 214.

¹³ El sábado 9 de junio se podía leer en la prensa lo siguiente: «Peces-Barba justificó la suspensión por lo avanzado de la hora (no eran las dos de la tarde) y trató de restar importancia al incidente de la repetición de votación [suspendida en primer instancia por falta de quórum]. Algunos diputados mostraron su contrariedad por la falta de interés con que se ha seguido el debate. Cuando ayer por la mañana comenzó la discusión, en los escaños del Grupo Popular había sólo dos diputados». También se indicaba en aquella noticia como al debate no asistiría ni Santiago Carrillo –quien defendía una enmienda para la devolución– ni el propio Joaquín Almunia ni Nicolás Redondo. Noticia, “Suspendido por falta de quórum el debate de la reforma del Estatuto de los Trabajadores”, *El País*, 9 de junio de 1984.

irresponsables”. Tras calificar de “fracaso total” la política económica del Gobierno, iba más allá: “Lo que CCOO quiere es que se cumpla el programa socialista”. Marcadas las oportunas e irrenunciabiles diferencias con el Ejecutivo en relación a cuestiones tan importantes como la contratación temporal, la conclusión era obvia: “Lo cierto es que se está aplicando una política antisocial y antisindical como ningún Gobierno se había atrevido a hacer”. Con la denuncia por delante de la política represora contra el movimiento obrero, Camacho se mostraba bastante pesimista sobre cualquier tipo de negociación: “Ya sabemos que con UGT el Gobierno sí se reúne. Es absurdo. La verdad es que no hace falta; con una simple llamada de teléfono pueden arreglar las cosas entre ellos”¹⁴.

Felipe González quien ya se había acostumbrado a asistir a todas y cada una de las asambleas de la patronal –ya fuera la CEOE o la CEIM– siempre bien flanqueado por Miguel Boyer, también se mostraría como un intenso asiduo a la Agrupación de Periodistas de Información Laboral¹⁵. *Escotado* en aquella ocasión por el señor Ministro de Trabajo, optaría por un tono más radical –que todavía alcanzaría mayores cuotas en las siguientes semanas– y demagógico al estilo peronista –“el Gobierno pasa de ser administrador a ser un empresario de una catástrofe”–. Igualmente declararía entonces durante la más de tres horas que duraría el citado encuentro –tal y como recogía Rodolfo Serrano– “[como] dijo estar de acuerdo personalmente con la absoluta liberalización del mercado de trabajo, afirmó que la gravedad de la situación obliga al Gobierno a adoptar decisiones duras y desagradables”.

Declaraciones que se producirían un miércoles 28 de marzo. Nunca antes el Presidente –que no los responsables del equipo económico¹⁶– se había mostrado tan franco con respecto a la cuestión de la flexibilidad. “Medidas tan duras como la flexibilidad del mercado de trabajo, que, en su opinión, es excesivamente rígido y reglamentario –continuaba así la crónica de Rodolfo Serrano–. Personalmente se muestra partidario de flexibilizarlo absolutamente, aunque reconoce que existe un cierto anquilosamiento intelectual a admitir medidas de flexibilización en la contratación”. En la crónica de Mariano Guindal para *La Vanguardia* recogería textualmente: “[se trata de un mercado de trabajo] laboralmente reglamentista, típico de una dictadura dura pero ineficaz desde el momento que se consiguió la libertad sindical”.

Por lo demás, en el ya conocido *tono autocrítico superficial* reconocería también errores en las previsiones. La causa: *la herencia recibida*, aunque con algún que otro matiz exculpatório *ex novo* que todavía no se había escuchado¹⁷. Y, por último, mostraría su predisposición a un pacto social tras “los sondeos necesarios [y cuando] tenga la certeza de que tantos empresarios como sindicatos están dispuestos, sinceramente a alcanzar acuerdos”. Eso sí “se mostró partidario de un pacto social para 1985 y 1986, con crecimiento [salariales]

¹⁴ Entrevista, “Marcelino Camacho”, *El País*, 19 de marzo de 1984. También se conocía en aquellos días como desde el PCE no se estaba por la labor de aminorar las movilizaciones sin negociación previa: Noticia, “El PCE mantendrá las movilizaciones si el Gobierno no quiere dialogar”, *El País*, 26 de marzo de 1984.

¹⁵ Noticia, Joaquín Estefanía, “Felipe González asistirá el jueves a la asamblea general de la patronal madrileña”, *El País*, 24 de abril de 1984. Véase aquí también: AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE INFORMACIÓN LABORAL, “Desempleo y contratación temporal: los grandes protagonistas en 1984”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1985), pp. 1358-1362.

¹⁶ Desde las conocidas declaraciones en el verano de 1983 en Santander, no había semana en que uno o dos miembros del equipo de Boyer volvieran a insistir en la *necesidad de una radical liberalización y flexibilización* del mercado de trabajo. Como ejemplo véanse las propias declaraciones de Boyer en una reunión de la OCDE en París días antes. Noticia, Alberto Valverde, “Miguel Boyer reafirma ante la OCDE que el déficit público español se reducirá al 3,5 del PIB en 1986”, *El País*, 14 de abril de 1984.

¹⁷ «Felipe González afirmó que el programa socialista había sido redactado en función de las cifras oficiales sobre la economía española divulgadas por Gobiernos precedentes, cifras que, cuando la izquierda accedió al Poder, resultó que no se correspondían con la realidad». Noticia, Vicente Clavero, “Felipe González reconoce un retraso en la creación de empleo, respecto a lo previsto”, *ABC*, 30 de marzo de 1984.

moderados”¹⁸. Y también con otra inexcusable condición: “El Gobierno está dispuesto a negociar todo, siempre que no se distorsione la política económica”.

Pero lo que terminaría por desatar –a escasos días de iniciarse una ronda histórica de negociaciones por parte del PSOE con los interlocutores sociales– el enfado de la UGT sería también el cuestionamiento por parte del mismo González del *papel* jugado por los sindicatos. “De los sindicatos opina que no practican un sindicalismo acorde con la crisis, porque, en el fondo, hay una mayor comprensión hacia las raíces de la situación que hacia las soluciones que hay que adoptar”. Y, por más, que calificará de “fluidas” las relaciones con la central socialista, criticará la *actitud* empresarial, y volverá a atacar a CCOO de haber realizado más huelgas que durante la transición –por más que fuera desmentido rotundamente por este mismo sindicato el 22 de febrero– la deslegitimación del papel de los sindicatos había quedado, nuevamente, reflejada. Organizaciones sindicales, a las que calificaría, ni más ni menos, que de *insolidarias*: “No se puede seguir actuando sólo y exclusivamente en defensa de los trabajadores con empleo, cuando una gran parte de la clase obrera se encuentra en el paro”¹⁹.

Llegados a este punto, de nuevo aparecería la *resignación ugetista* cuya tenacidad no se podía poner en duda. A diferencia de lo que sucederá un mes después, por el momento, se guardaría un “prudente silencio” así como se evitaría contestar en público, en tanto se estaba ante unas posibles negociaciones que no podían, de entrada, descarrillar de entrada. Así desde la Ejecutiva de UGT en su reunión del 3 de abril, se limitaría a indicar lo siguiente: “considerando que no han sido oportunas las referencias realizadas en cuanto a la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo en nuestro [p]aís y el papel no positivo que mantienen los sindicatos en torno a la actual crisis económica”, se cerraría este *tropiezo*. Ni una sola palabra de más se escucharía en la prensa diaria ni en la prensa ugetista. Asimismo se decidiría que a la reunión con el PSOE en su sede central irían el Secretario General, el Secretario de Acción Sindical, el Secretario de Acción Institucional y el Secretario de Imagen. A saber, Redondo, Corcuera, Zufiaur y Ordóñez²⁰.

“El PSOE se convirtió prácticamente en un sello de caucho para la política del Gobierno”, señaló en su día Richard Gillespie con no pocas dosis de ironía²¹. Así era. Desde la victoria socialista en octubre de 1982, prácticamente, había desaparecido de la escena política de primera fila, más allá de alguna que otra declaración²², alguna nota de prensa con respecto las reuniones del CEF²³, o, por ejemplo, cuando diera a conocer el tantas veces citado *Documento de Estrategia* de octubre de 1983.

En una coyuntura de cierta quemazón contra el Gobierno, contra su equipo económico en relación a la alta conflictividad laboral y cuando todas y cada una de las previsiones y pronósticos chocaban contra la realidad económica; desde la Ejecutiva del PSOE se trataría de retomar el pulso así como la agenda política de cara un hipotético pacto social. Estamos a

¹⁸ Noticia, Vicente Clavero, “Felipe González reconoce un retraso en la creación de empleo, respecto a lo previsto”, *ABC*, 30 de marzo de 1984.

¹⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Felipe González cree que el Gobierno no ha sabido explicar a la sociedad el alcance y las razones de su política laboral”, *El País*, 30 de marzo de 1984; Noticia, Mariano Guindal, “El Gobierno está dispuesto a negociar todo, mientras no se distorsione la política económica”, *La Vanguardia*, 30 de marzo de 1984.

²⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 27. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 3 de abril de 1984”, sig. 002251-003.

²¹ GILLESPIE, Richard, *Historia del Partido...*, *op.cit.*, p. 431.

²² Un ejemplo en, Noticia, “El PSOE prepara una campaña de difusión de la política económica del Gobierno”, *El País*, 29 de enero de 1984. Véase lo apuntado en el Capítulo 11, *nota 210*.

²³ Véase en el Capítulo 11, *nota 72* y *nota 73*.

finales de marzo de 1984. Comienza la *3ª fase de reacción*, a partir de los propios *sondeos* de los que hablará Felipe González días antes²⁴.

Adoptada tal decisión desde la CEF del PSOE durante la primera semana de abril se prepararía una ronda de diálogo con los interlocutores sociales, que se llegaría a conocer en su momento como los “diálogos de Ferraz” de cara a establecer un “consenso social estable”²⁵. Todo ello a cargo de una comisión encabezada por Enrique Múgica, Pedro Bofill, Guillermo Galeote y Manuel Chaves. El objetivo oficial, *tantear* a las fuerzas políticas y sindicales sobre la posibilidad de un nuevo pacto, a la par que defender, punto por punto, todos y cada uno de los *objetivos económicos* del Gobierno. A lo que se acompañaría de una campaña informativa sobre tales cuestiones²⁶. Por cierto, en un nuevo ejercicio de demagogia a la par que de voluntarismo economicista estéril, se seguía manteniendo la proyección de creación de empleos a finales de la legislatura en 700.000²⁷.

El miércoles 4 de abril de 1984 se abriría el telón del teatro de la política, que griegos, primero, y luego los romanos, inventaran hace tantos siglos. De esta forma, empezaba a quedar meridianamente claros los fines perseguidos por los socialistas. Más que buscar un *pacto de Estado*, al estilo de los Pactos de la Moncloa, se pretendía retomar la política de concertación social como fuera y con quien fuera posible. Eso sí, Manuel Chaves –en su permanente dualidad PSOE/UGT– dejaba bien claro en la primera reunión que se tenía –con UGT, cómo no– de que no era ni siquiera pensable negociar “una política económica que ya se está aplicando”. Dejando, además, otro doble recado: “[L]a sociedad española está viviendo por encima de sus posibilidades”. Cita hispana donde las haya en tiempo de crisis del modelo económico capitalista. Por otro lado, y en lo que *ABC* calificaría como un ejemplo de “ortodoxia liberal con los escritos de Hayeck”, Chaves declararía –frases que *El País* directamente omitiría, tal y como solía proceder en este tipo de casos– también en aquella reunión:

«Si queremos salir del pozo de la crisis económica y luchar contra el desempleo, la solución no pasa solamente por el sector público, sino por la inversión a través del privado. Por tanto, lo lógico y necesario es garantizar el excedente neto de las empresas que tengan beneficios suficientes para que puedan invertir y, lógicamente, puedan crear puestos de trabajo»²⁸.

Por lo demás, UGT se mostraría proclive a llegar a acuerdos y en apoyar, a pesar de los nuevos sacrificios que se dibujaban en el horizonte, las previsiones del cuadro macroeconómico

²⁴ La primera noticia que se tiene es la siguiente: Noticia, “La ejecutiva del PSOE quiere, celebrar una entrevista con Comisiones Obreras”, *El País*, 31 de marzo de 1984.

²⁵ OLIÉT PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, *op.cit.*, p. 197

²⁶ Véase lo apuntado en la *nota* 23.

²⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “El PSOE pide la participación de todas las fuerzas sociales para cumplir los objetivos del Gobierno”, *El País*, 3 de abril de 1984.

²⁸ Editorial, “Confusión en el cambio”, *ABC*, 4 de abril de 1984. Días después se conocía el apoyó, casi en términos absolutos, de la Misión del FMI anual en España al camino emprendido por el Gobierno de España. Todavía más, pues el presidente de la OCDE Van Lennep en una misiva a Miguel Boyer no sólo se mostraban asombrado por la tenacidad y firmeza del Gobierno español, sino que además señalaba: «Deseo para España [...] un éxito de esta política y, espero que el examen por la organización de la economía de vuestro país contribuirá a mejorar la comprensión de los efectos beneficios de estas políticas económicas sobre el plano nacional e internacional». Noticia, Alberto Valverde, “La OCDE reitera que sólo una política de ajuste estructural permitirá corregir los desequilibrios de la economía española”, *El País*, 7 de abril de 1984.

del Gobierno²⁹. No obstante, muy pronto se volverían a las viejas como habituales maniobras ugetistas.

A partir de aquel primer encuentro se desarrollaría toda una rápida ronda de negociaciones. El viernes 6 con CCOO. Allí por vez primera desde el PSOE –en modo de portavoz pseudo-oficial del Gobierno– admitiría posibles “márgenes de negociación en el cuadro macroeconómico”. Eso sí, de nuevo, sin detalle alguno o dato a manejar. Lo más importante de aquella reunión sería el acuerdo de evitar los insultos y los malos modos en adelante, una vez que los asistentes de CCOO se habían tomado dicho anuncio con total escepticismo³⁰. Hasta ese punto se había llegado, a pesar que desde la reunión de la Ejecutiva de CCOO del día 25 de abril, se valorara como “positivo el diálogo abierto con el PSOE”. Por más que exigiera una “negociación real y en profundidad sobre los ejes fundamentales de la política económica”, las desconfianzas frente al PSOE y el Gobierno seguirían siendo la nota dominante³¹.

El lunes 9 el encuentro tendría lugar con la CEOE. Allí la consonancia sería mayor más allá de los consabidos reproches de la patronal con respecto a la rigidez de la política monetaria. Pero lo más trascendente de la misma sería la enésima vuelta de la *narrativa socialista* en boca una vez más de Manuel Chaves. Tras decir que el cuadro macroeconómico “seguida siendo inamovible” admitiría la posibilidad de que temas como la Seguridad Social y otros se pudieran negociar en lo que no dejaba de ser otra gran contradicción³². Por lo demás, en los siguientes días se reunirían con el resto de fuerzas parlamentarias.

Ahora bien, tras aquella efímera ronda de contactos se iría perfilando las iniciales propuestas del Gobierno a través del PSOE no sin cierto teatralización de por medio³³. Primero, el pacto tendría exclusivamente lugar entre los agentes sociales de cara a la posible reedición de un nuevo marco que superará los clásicos acuerdos interconfederales, en el camino que mediaba entre los Pactos de la Moncloa y el ANE. Segundo, se trataría de un acuerdo bianual. Tercero, el objetivo central se centraría en lograr el mayor consenso posible con respecto a la política económica. Cuarto, el otro objetivo fundamental sería frenar la conflictividad laboral. La única duda, tanto por parte de la Ejecutiva del PSOE como por varios ministros era, entonces, si el Gobierno participaría directamente con su firma o simplemente trataría de influir en la negociación³⁴.

Los denominados *diálogos de Ferraz* duraron lo que duraron. En lo básico, diez días en términos públicos, aunque a partir de ahí se iniciará toda una serie de maniobras políticas bajo la sombra. Desde el Partido se realizaría una inusual auto-promoción interna de las virtudes de

²⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El PSOE desmiente que haya un intento de repetir los «pactos de la Moncloa»”, *El País*, 4 de abril de 1984. Véase asimismo, Noticia, Gustavo Matías, “Escepticismo ante las previsiones de empleo asumidas en el nuevo intento de concertación”, *El País*, 5 de abril de 1984.

³⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “El PSOE admite a CCOO que hay un margen de negociación en el cuadro macroeconómico”, *El País*, 7 de abril de 1984.

³¹ AHT, CCOO-CEC, “Comunicado de prensa. CCOO considera ineludible la participación del Gobierno en las negociaciones las fuerzas sociales”, Madrid, 26 de abril de 1984, sig. 001-00043.

³² Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE insiste en la falta de expectativas empresarias de la actual política económica”, *El País*, 10 de abril de 1984.

³³ Un ejemplo un tanto escandaloso lo proporcionaría una noticia sin firmar en donde se podía leer: «El Partido Socialista Obrero Español intentará convencer al Gobierno de que flexibilice su política económica para lograr un futuro pacto social entre sindicatos patronal». Añadiendo. «Flexibilidad que no está tanto en el contenido de la política seguida hasta ahora [...] cuanto en la forma de su presentación y detalles puntuales». Noticia, “El partido socialista intentará que se flexibilice la política económica par a lograr un futuro pacto”, *El País*, 29 de abril de 1984.

³⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “El PSOE propondrá a patronal y sindicatos un nuevo pacto social”, *El País*, 11 de abril de 1984; Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno admite su presencia en el pacto social con patronal y sindicatos”, *El País*, 13 de abril de 1984; Noticia, “El PSOE cree que el Gobierno no debe participar directamente en un pacto social”, *El País*, 14 de abril de 1984.

aquellas reuniones que, en términos prácticos, por más que en apariencia tan sólo sirvieran para marcar las posiciones de cada agente, abriría, en realidad, la *espita* de un futuro marco de negociación que, eso sí, se retrasaría notablemente en el tiempo hasta su apertura oficial.

Desde las páginas de *El Socialista*, ni más ni menos, que tres números se dedicarían al asunto en tan sólo en el mes. Y ello en las páginas de *nacional* que no en las de *laboral*. Así, por ejemplo, si en el número 356 –correspondiente a los días 4 al 10 de abril– se daba la noticia de cómo el PSOE se reuniría con otras fuerzas sociales³⁵; en el siguiente, el número 357 –correspondiente a los días 11 al 17 de abril– se le dedicaría la portada y el primero de los dos editoriales seguidos. Todo un síntoma de la necesidad política del socialismo de recuperar tanto el ritmo de la *agenda política* como de generar una nueva *imagen política*.

“El PSOE, abierto al diálogo. Contra la crisis y el paro”, era la portada del citado número, con fotografía de familia entre los negociadores del PSOE y de la UGT. Vendido tal escenario como un “gesto de buena voluntad de los socialistas por encontrar el mayor grado de coincidencia de otras fuerzas políticas y sociales en la lucha contra la crisis y el desempleo”; el editorial correspondiente titulado “Necesidad de la cooperación”, dejaría, a un lado temporalmente, los ataques contra la patronal y las Comisiones Obreras, para centrarse en la necesidad de llegar a cualquier tipo de acuerdo, “[I]lámease concertación, pacto. Poco importa el nombre”. “[T]odos estamos llamados a cooperar”, se advertía. ¿Habría llegado el momento de *ir todos a una* en una *salida* conjunta de la crisis? Así parecía ser. Más aún, pues un halo de esperanza podía visualizarse en el ritmo de la economía: “Esto no quiere decir que nuestra economía esté pasando por momentos «muy graves», como se ha escrito en algunos medios, con indudable desprecio de los datos económicos y con malévola intención política”. En lo que no dejaba de ser un *gesto* con doble intención, incluso, se abriría la crónica correspondiente con fotografía de Marcelino Camacho, flanqueado por Ariza y Agustín Moreno. En realidad, poco o nada, se diría de nuevo que no se hubiera conocido por la prensa, más allá que se diera la primicia de que Enrique Múgica había sido quien había bautizado tales encuentros como los *diálogos de Ferraz*. Lo que no quiere decir que no faltarán los correspondientes mensajes políticos, cuando a continuación se pasara revista a las nuevas previsiones realizadas por Boyer –en un tono, otra vez, optimista y sin mayores autocríticas– y se dejará caer lo siguiente: “En consecuencia es *imprescindible que la inversión privada crezca a las tasas previstas* para que, al tiempo que se renueva el equipo de capital, se consiga incrementar la demanda interna, con el fin de conseguir crecer a las tasas exigidas para creación de empleo”³⁶.

Confiados en el éxito de esa citada ronda de negociaciones, en el editorial de *El Socialista* del siguiente número –el 358, correspondiente a los días 18 al 23 de abril– se iría un paso más adelante. En un tono excesivamente cordial se afirmaría:

«Sin embargo, tal y como señalábamos en el editorial anterior, cualesquiera que sean los puntos de vista, las soluciones no pueden ser otras ‘sino exclusivamente aquellas que corresponden a los datos del problema’. De aquí, la ausencia de alternativas viables al programa económico del Partido Socialista y, al mismo tiempo, la coincidencia en la necesidad de crear un clima de confianza, un ambiente favorable a la puesta en práctica de las medidas que se requieren para colocar a la economía española en condiciones de recuperación sostenida».

Había, pues, llegado el momento de construir un “clima favorable” para el diálogo, pero sobre para dejar que se lanzarán infundios contra la política económica, que *inclusive* ponían en *duda* la “eficacia de las acciones que a su realización conducen y fomenta la incertidumbre”. “Habrá concertación” anunciaría la crónica correspondiente en el citado número para explicar a continuación: “¿Qué busca el PSOE con los diálogos de Ferraz?”.

³⁵ “El PSOE se reúne con otras fuerzas políticas”, *El Socialista*, nº 356, (1984), p. 27.

³⁶ Portada, “El PSOE, abierto al diálogo” (p.1), “Los «diálogos de Ferraz»” (p. 3), Editorial, “Necesidad de la cooperación” (p. 7); “El PSOE, abierto al diálogo” (10-11); “Objetivo: Rebajar la tasa de desempleo al 15,2 por 100 de la población activa” (pp. 12-15), todos ellos en *El Socialista*, nº 357, (1984).

Llegar a una *concertación*, “[p]orque esa es una condición necesaria y casi imprescindible para llevar a buen puerto el programa socialista del Gobierno”. Y aquí, sin duda, había un cambio mayúsculo, pues, en menos de tres meses se había pasado de ignorar cuando no despreciar la concertación a considerarla “casi imprescindible”. Pero tanto o más interesante que discernir sobre la “verdadera” voluntad política del socialismo, eran las palabras del Ministro de Trabajo, quien no dudaría en hablar como la “desviación salarial (del 6,5 por 100 previsto por el Gobierno) al 7,5 en la realidad de los convenios hasta ahora negociados”, estaban perjudicando las previsiones gubernamentales. En todo caso, el camino estaba marcado: habría segunda vuelta y no se dudaría en señalar como las conversaciones habían discurrido en un “tono de cordialidad y buen entendimiento”³⁷.

Mientras que se esperaba esa anunciada nueva ronda de reuniones y diálogos –que nunca llegarían– la UGT –como hemos adelantado– por su parte pondría en marcha su tradicional estrategia de reuniones bilaterales y secretas con el fin de llegar a la apertura oficiosa con un acuerdo lo más avanzado posible. Volvía al terreno donde mejor sabía moverse. De hecho, la simple apertura de los *diálogos de Ferraz* constituía un potencial escenario objetivo, en donde poner en marcha sus tesis Congresuales, y reducir posibles riesgos y enfrentamientos: “Dichas reuniones se consideran positivas por cuanto que viene a suponer intentar aplicar la política concertada que propugnamos”, se podía leer en el acta de la CEC del 10 de abril de 1984, para a continuación indicar como en caso de que hubiera más se presentarían de “manera más concreta nuestras posiciones”. Y a la espera de nuevas convocatorias, a las dos siguientes semanas ya se acordaría “mantener una reunión con el PSOE con el fin de clarificar conceptos de cara a las próximas reuniones que mantendrá el PSOE con las distintas fuerzas sociales”³⁸. ¿Funcionaría en aquella ocasión los contactos bilaterales y secretos?

Días después de la celebración del accidentado 1º de Mayo se seguiría con la lenta filtración de los planes gubernamentales como era costumbre. La fuente, de nuevo, *El País* y más concretamente a través de Rodolfo Serrano. En una noticia fechada el 5 de mayo se decía que el pacto social se llevaría a cabo mediante dos mesas paralelas –la primera entre sindicatos y patronal– y la segunda –entre agentes sociales y el Gobierno–. Especialmente interesante –por su novedad, al menos, en términos mediáticos– resulta esta última, ya que se indicaba como el Gobierno negociará “determinados aspectos de su política económica, no en la línea de modificarla, pero sí de flexibilizar en lo posible”. En todo caso, inclusive en aquellas avanzadas fechas –y tras más de un mes de ir y venir reuniones– también se señalaba como todavía no había recibido CCOO la invitación formal, teniendo presente que tanto UGT como la CEOE no habían dejado de entrevistarse con el Gobierno, tal y como hemos podido verificar a través de las actas de la CEC de UGT. Pero también, y sin disimulo alguno, se decía que la “gran baza” del Gobierno para asegurarse el apoyo de los sindicatos era el “patrimonio sindical”. Llegados allí inclusive las formas parecían haberse olvidado³⁹. Pero sobre todo, quedaba también por enésima vez claro que la voluntad política del Ejecutivo era bastante relativa en términos prácticos.

En cualquier caso, la *política de distensión* no duró ni una semana tras la ronda de contactos de abril. Superado el ecuador del mes de abril, el cruce de acusaciones entre CCOO y

³⁷ Editorial, “Las razones de la sociedad” (p. 7); “Habrà concertación” (pp. 10-12), ambos en *El Socialista*, nº 358, (1984).

³⁸ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 28. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 10 de abril de 1984”, sig. 002251-003; AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 30. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 24 de abril de 1984”, sig. 002251-003. Véase la explicación dada sobre la forma de proceder a redactar las *actas* de la Ejecutiva socialista en el Capítulo 10, *nota* 73.

³⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El futuro pacto social se instrumentalizará a través del establecimiento de dos mesas paralelas”, *El País*, 5 de mayo de 1984. Días más tarde se conocía que tanto CCOO como UGT querían que el Gobierno participara en aquel pacto social. Noticia, “Las centrales piden que el Gobierno participe en la concertación social”, *El País*, 11 de mayo de 1984.

UGT, incluido aquí el Gobierno, volvería a ser la nota dominante⁴⁰. No obstante, el cierre de aquel mes de abril estaría marcado, ante todo, por la división sindical de cara a la celebración del citado 1º de Mayo, por la radicalización discursiva de Felipe González, y que mal casaba, precisamente, con las llamadas al diálogo del mismísimo Miguel Boyer, que con todos los matices imaginables no dejaban de constituir un ligero *cambio cualitativo*, al menos, en términos estéticos⁴¹.

Por *méritos propios* Felipe González —en esa trayectoria liberal ascendente por *motu proprio*— coparía las portadas de los periódicos el día 27 de abril. Entre ellos el de *ABC* —en un indisimulado homenaje—: “El sistema capitalista es el menos malo, es el que mejor funciona”. No era la primera vez que dejaba deslizar opiniones de ese tipo, pero sí la más clara y rotunda y ello a menos a cuatro días de la *fiesta* de los trabajadores. En este sentido, otros tantos ejemplos se podían citar. También señalaría en aquella ocasión: “[N]o se nos puede pedir que seamos especialmente socialistas en nuestra política económica”. Si ahora escuchar esta afirmación no resulta chocante, tras tantos años de normalización y asimilación del discurso hegemónico compartido por las dos grandes opciones políticas nacionales; a mediados de los años ochenta, inclusive en boca del Presidente del Gobierno, resulta cuando menos inusual.

No se quedaba allí *ABC*. En un editorial de *tono optimista*, señalaba como, una vez más, un socialista había superado en lo narrativo a los propios neoliberales de pro —“superó las tesis reaganistas”— o directamente se asociaría sus propuestas con “posiciones ideológicas consustanciales a la derecha liberal”. Todo un conjunto de evidencias más que de sospechas que conducían a una *alterada* conclusión para el *ABC*: “La división interna del socialismo y la falta de dirección efectiva lleva, en ocasiones, a la paralización del poder y, en ocasiones, al dogmatismo totalitario”⁴².

Por su parte *El País* en su tradicional línea informativa dejaba la afirmación pro-capitalista de González en un lugar secundario, para contextualizarla, adecuadamente, en el ambiente tenso de la asamblea de la CEIM. Se centraría en destacar Rodolfo Serrano los abucheos que había tenido que soportar Felipe González, cuando denunciaría como cerca del 45% de los empresarios y profesionales no declaraban a Hacienda. Asimismo González insistiría en la *necesidad de flexibilizar* el mercado de trabajo, añadiendo, que “hay que tener en cuenta que los empresarios deben flexibilizar también sus actitudes y olvidarse de los paternalismos y protecciones del pasado”. Descartando —y esto cobrará importancia por lo que sucederá en la fase final del AES— cualquier tipo de política favorable al despido libre⁴³, haría referencia —prácticamente por vez primera— a la negociación parlamentaria de la RET’84: “[L]as medidas para flexibilizar la contratación que están en el Parlamento —y que ustedes consideran insuficientes— nos igualan con los países de nuestro entorno”. Una afirmación

⁴⁰ Noticia, “Ariza justifica las movilizaciones de CCOO contra la política del Gobierno”, *El País*, 16 de abril de 1984; Noticia, María José Porteiro, “UGT denuncia afinidades entre la derecha y los comunistas para desplazar al PSOE del poder”, *El País*, 17 de abril de 1984.

⁴¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Miguel Boyer anuncia que el Gobierno no tiene inconveniente en participar en el acuerdo social si lo desean patronal y sindicatos”, *El País*, 29 de abril de 1984. También se informaba en aquella ocasión de que el González en una reunión con la Agrupación de Periodistas de Información Económica (APIE), prefería, por el momento, que el Gobierno no se involucrara.

⁴² Editorial, “González y el capitalismo”, *ABC*, 27 de abril de 1984. Semanas después el mismo Manuel Fraga señalaba, tras considerar un *mal menor* la política económica socialista, como: «[n]o es, desde luego, una política socialista; es una política socialdemócrata». Noticia, Rodolfo Serrano, “Fraga asegura que no puede haber concertación mientras que la política económica sea inamovible”, *El País*, 10 de mayo de 1984.

⁴³ Los niveles de destrucción de empleo habían llegado a tales cuotas, que inclusive José Antonio Segurado se mostraría, un día después de la *famosa* intervención de Felipe González, contrario al despido libre: «Hace siete años, yo sí era partidario, pero en la España de hoy esto no es posible. Significaría 250.000 a 300.000 nuevos parados, que serían difíciles de asumir». Noticia, “La economía «negra» provoca redes mafiosas de protección, según Segurado”, *El País*, 28 de marzo de 1984.

medida y de no poca importancia, y que no reflejaba la realidad: para la parte económica del Ejecutivo el proyecto acordado con la UGT en noviembre de 1983 de la RET'84, les había parecido insuficiente cuando no modesto en términos flexibilizadores.

Por último, el Presidente de la Nación, recordaría como durante el tiempo en que llevaban los socialistas en el Gobierno se había producido un considerable excedente empresarial –otro de los debates que saldrían a la palestra durante el AES⁴⁴– pero que este no se había reinvertido en la generación de empleo. Una advertencia suave y prácticamente única contra la actitud de los empresarios.

Las anteriores declaraciones se producían a escasos días de la celebración del 1º de Mayo –como avanzábamos– y que con tanto ahínco venía preparando la Ejecutiva de UGT desde, al menos, el mes de marzo. Pero inclusive la *resignación ugetista* tenía sus límites. Si ante las declaraciones de marzo se optaría por un prudente silencio, las efectuadas por González a finales de abril sobrepasarían una “línea roja” intolerable para la central socialista. En el número 53 de *Unión* correspondiente a la segunda quincena de Mayo, la celebración del 1º de Mayo, pasaría a un segundo plano –a pesar de su trascendencia política y simbólica– y se abriría el mismo con un gran titular: “Con preocupación”.

Por primera vez desde que habían llegado los socialistas al poder en el ochenta y dos, el órgano de expresión de la CEC de UGT denunciaría la actitud y las declaraciones del Presidente del Gobierno. En una muy dura nota editorial –pese a que desde que se había iniciado la nueva etapa de la citada revista, la *nota de opinión* había desaparecido en la práctica– se empezaría indicando:

«Se ha comprobado en algunas oportunidades la formulación de juicios que, por no encontrarse en el marco de valores que damos por entendido, causan cierta perplejidad a los compañeros de la gran familia socialista».

No sólo habían fallado el *método* como la *oportunidad*, sino sobre todo el “contenido”. Sin hacer referencia explícita a las declaraciones contra las que se arremetía, “parece necesario expresar una serena pero firme discrepancia con algunos conceptos que han tenido trascendencia pública”. Recordatorio previo sobre el modelo económico aprobado en la constitución –es decir, una “economía social de mercado”– y la necesidad de *defender la utopía* de una transformación socialista de la sociedad:

«Los compañeros socialistas no nos conformamos con los sistemas económicos menos malos, sino que reivindicamos lo mejor [...]. Las formulaciones teóricas son necesariamente generales, por lo que es imprescindible, precisar también las medidas concretas: en nombre de la economía no podemos consentir, por ejemplo, que se vacile a la hora de regular las obligaciones fiscales de los Colegios Profesionales [...] o que se repita incansablemente que hay que flexibilizar a los trabajadores cuando los empresarios no se flexibilizan, ni pagan impuestos, ni cotizan a la Seguridad Social, ni crean puestos de trabajo».

Pero la respuesta tantas veces postergada, no terminaría ahí: “Rechazamos que existan planteamientos macroeconómicos puramente científicos, y por lo tanto, exentos de ideología”. De esta forma: “Desde el punto de vista de un Gobierno no existen planteamientos macroeconómicos asépticos, pero el Gobierno no es un laboratorio de análisis ni una sala de estudios”. Nunca, hasta entonces, se había escrito desde la UGT ningún documento contra la política tecnocrática del Ejecutivo, verdadero pilar de su proyecto de modernización.

“Hay, claramente, una economía de izquierda y una economía de derechas, y la opción de los socialistas no puede ser sino a favor de la primera”, proseguiría la nota editorial. Asimismo era intolerable que los llamados *científicos* siguieran conduciendo la “economía”. A lo que se le acompañaría de todo un recordatorio de los postulados socialistas –con cita incluida del primer número de *El Socialista* de 1986 sobre los “factores capital-trabajo”– para finalizar: “con sensatez, con diálogo y concertación, con miras de futuro y de envergadura nacional,

⁴⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “Felipe González, abucheado en una asamblea de la patronal madrileña”, *El País*, 27 de abril de 1984.

UGT siempre ayudará a que se tomen las decisiones económicas socialistas, que sí que existen”. Y para que no quedaran dudas, se publicaría un informe en donde se saldría al paso de la culpabilización de los salarios⁴⁵.

Pero volviendo a la celebración del 1º de Mayo de 1983, ha de recordarse como en el año anterior el mismo había concluido con un total enfrentamiento –e inclusive físico– entre los dos principales sindicatos de clase de España. De esta forma, el 20 de abril, domingo, ya se aventuraba la posible participación del mismo Felipe González en la manifestación-mitín del 1º de Mayo en los actos organizados en Bilbao por UGT⁴⁶. Una muestra más de que la unidad de acción en aquel preciso momento no siquiera era imaginable pero tampoco rentable estratégicamente. A partir de ahí, y hasta la celebración de la fiesta del trabajador, el enfrentamiento entre los sindicatos se iría calentando a niveles que iban mucho más allá de diferencias en lo estratégico y en lo político.

En un espiral ascendente y con no pocas dosis de radicalismo verbal daría inicio una aguda discusión en el terreno sindical que tendría la virtud de evidenciar las dos culturas políticas, junto con sus respectivos imaginarios colectivos entre el sindicato socialista y comunista, tan distantes entre sí. Así pues, mientras que CCOO mantendría el carácter reivindicativo de tal día⁴⁷, UGT apostaba por convertir a tal celebración en una fecha festiva, que buscaba su institucionalización⁴⁸.

⁴⁵ Editorial, “Con preocupación” (pp. 1 y 3); “Los salarios no son culpables” (p. 4), publicados ambos en *Unión*, nº 53, (1984).

⁴⁶ Noticia, “Posible participación de Felipe González en el Primero de Mayo de UGT en Bilbao”, *El País*, 20 de abril de 1984.

⁴⁷ En el largo manifiesto de CCOO se denunciaría, de entrada, el intento de UGT de avanzar hacia «la ‘institucionalización’ formalista de la fecha, que desvincula su significado, pretende la división de la clase obrera, y restarle fuerza a su impulso transformador». Repasado, uno por uno, todos los efectos negativos que había conllevado los *16 meses de gobierno* del PSOE, no se dudaría tildar a su gestión como ejemplo de una «política antisocial, [que] viene a sumarse una actitud antisindical del gobierno, con el diseño de Leyes como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que sin la negociación al menos de Comisiones Obreras, apunta a obstaculizar el desarrollo de un sindicalismo participativo». Más aún, pues gracias a esa «política antisocial y antisindical, en la que ha encontrado cobertura la gran patronal CEOE para lanzar con más fuerza su agresión contra los intereses de los trabajadores». Una patronal a la que se acusaba de haber hecho naufragar el AI’84. Igualmente se valoraría positivamente la política de presión y movilizaciones que habían permitido resistir la embestida liberal del Ejecutivo, en especial en lo referente a los *topes salariales*. Recordándose como en dichas «acciones todas ellas que han contado con un gran respaldo de los trabajadores y en no pocos casos con la participación unitaria de afiliados, militantes y organizaciones de base de UGT, a pesar de la posición contraria de sus dirigentes [como] a pesar también de las medidas represivas una veces en la forma de ‘servicios mínimos’ que en algunas empresas públicas suponían cercenar el derecho constitucional a la huelga, otras, con coacciones y amenazas de los empresarios, otras con la utilización de las fuerzas del orden publico contra los trabajadores». Denunciada la represión contra el movimiento obrero, se finalizaba afirmando como «es posible otra política económica, y la C.S. de CC.OOO, reitera su plena disposición a corresponder en una negociación que ponga en marcha una autentica política de solidaridad nacional». AHT, CCOO-CC, “La Confederación Sindical de CCOO ante el primero de Mayo de 1984”, sig. 2-14.

⁴⁸ Véase al respecto el manifiesto elaborado por la UGT para tal fecha: “1º de Mayo. Solidaridad, más que una palabra”, *Unión*, nº 51-52, p. 3, en donde se llegaría afirmar: «Ha sido también un año en el movimiento sindical en que se han acentuado las diferencias entre los que hacen ruido y los que consiguen algunas nueces. La Unión General de Trabajadores ha desarrollado una política firme, coherente y eficaz, que se ha traducido en conquistas importantes para los trabajadores». A partir de donde se nombraban no pocos paquetes normativos, aunque con la excepción de la RET’84. E igualmente se decía: «La UGT considera que la solidaridad tiene que ser algo más que una palabra. Ha de significar luchar contra el fraude y la evasión fiscal, para repartir el trabajo, recudir la jornada, mayor aportación de la Banca y de los empresarios en la salida de la crisis; una mayor protección de los parados; asegurar la protección social para millones de pensionistas; la superación de los corporativismos insolidarios; la austeridad de los cargos públicos; el compromiso efectivo y la concertación de la sociedad y de sus

De nada valieron los tibios intentos de CCOO –vía misiva que no se contestaría por parte de UGT– de celebrar unitariamente el Primero de Mayo. A la decisión de UGT de llevar el mitin central a Bilbao, contando con Felipe González, también se sumaría la invitación a los periodistas laborales de Madrid que cubrían las noticias laborales. Apuntaba así Rodolfo Serrano: “Para este sindicato [Comisiones Obreras], la invitación a los periodistas laborales de Madrid para acudir a los actos de Bilbao trata de vaciar mediáticamente la manifestación que ha convocado CCOO en la capital de España”⁴⁹.

Próximo a la citada efeméride, Camacho salía a la palestra denunciando el “*show de vedettes y ministros*” cuando se conocía, entre otros pormenores, que el humorista José Luis Coll haría de presentador de los actos de UGT⁵⁰. No se terminaría ahí el enfrentamiento. Todavía se calentaría más, hasta anunciarse oficiosamente la ruptura de relaciones entre los órganos de dirección de UGT y CCOO. Por otro lado, mientras que Comisiones Obreras denunciaba la *actitud partidista* del Presidente del Gobierno, Redondo echaba leña al fuego: “La unidad estaba rota ya. La unidad es una cosa que hace falta mimarla durante todo el año”⁵¹.

representantes para superar el presente y abrir las puertas del futuro». Asimismo se elaboraría un manifiesto conjunto entre el PSOE, las Juventudes Socialistas y la propia UGT que se puede localizar en, “El PSOE, la UGT y las JSE ante el 1º de Mayo”, *El Socialista*, nº especial 1 de Mayo, (1984). Un ejemplar, en donde además de recoger laudatorios artículos de Antón Saracíbar sobre la *ejemplar disciplina* con que se había llevado a cabo la negociación colectiva, o el de José Luis Corcuera sobre las negociaciones en torno a la reconversión industrial, también se incluiría una entrevista con el propio Redondo, en el que al respecto de las causas de no convocatoria conjunta con CCOO señalaría: «Porque por una parte CCOO ha organizado su manifestación en Madrid, y por otra parte porque las relaciones con CCOO como ocurrió el año pasado, no son todo lo buenas que deberían ser durante trescientos sesenta y cuatro días del año, y el trescientos sesenta y cinco no puede hacer una acción conjunta cuando hay diferencias palpables. Nosotros no estamos dispuestos a que se insulte a los compañeros de UGT en las fábricas durante todo el año y luego durante dos horas del último día vayamos como si nada pasara entre nosotros». No obstante, el propio Secretario General de la UGT no dudaría en salir, una vez más, al paso de ciertas declaraciones y afirmaciones sobre el papel de los sindicatos en la sociedad: «Soy optimista a este respecto [recuperación económica y creación de empleo], y creo que el próximo año mejorará algo la situación del empleo. Ahora bien, todo ello va a depender de la política que siga el Gobierno. Lo que sí quiero dejar muy claro es que nosotros, la UGT, hemos tenido un comportamiento responsable, no sólo en la teoría, sino en la práctica para buscar salidas a la crisis, luego cualquier manifestación contraria al respecto no es tolerable. Quienes digan que la UGT no se ha sabido adaptar a una situación de crisis no está diciendo la verdad. No somos perfectos, pero si alguien, por encima de empresarios o de partidos, ha hecho algo por conseguir la concertación y que no se rompiera la línea de otros años, lo hemos hecho en la Unión General de Trabajadores». Entrevista, “Nicolás Redondo” (pp. 4-5).

⁴⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “CCOO y UGT utilizarán el 1 de Mayo para determinar su respectivo poder de convocatoria”, *El País*, 25 de abril de 1984.

⁵⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “Camacho acusa a UGT de convertir el Primero de Mayo en un ‘show’ de ministros”, *El País*, 26 de abril de 1984. El mismo Marcelino Camacho señalaba en un artículo de opinión días después lo siguiente: «Mantendremos el carácter de clase impidiendo que degeneren en fiestas rituales como las del pasado reciente o las de algunas instituciones actuales de nuestro país». Tampoco dejaba pasar la ocasión para criticar la lógica flexibilizadora –«se modifica la legislación en sentido negativo al generalizar la contratación temporal»– señalando por último: «[E]l Gobierno no debe olvidar que lo que ha fallado no es la difusión de su imagen, sino que lo que ha fracasado es su política económico-social». CAMACHO, Marcelino, “Por la reindustrialización, la reforma agraria integral y la paz”, *El País*, 1 de mayo de 1984.

⁵¹ Noticia, “Los sindicatos aprovechan el fin de semana para ultimar los preparativos del 1 de Mayo”, *El País*, 29 de abril de 1984. El día 1 de mayo publicaría un artículo de opinión en *El País* el propio Redondo, en el que tras revisar todas las consignas y tópicos de la UGT, más allá del claro apoyo a la gestión del PSOE, se introducían tres notas singulares a tener presente. Primero, la apuesta por la concertación: «Debo recordar que la solidaridad ha sido el sustrato de la estrategia de concertación y acuerdos que hemos venido desarrollando en los últimos años, y en la actualidad seguimos persuadidos de la validez de tal planteamiento». En segundo término, indicaba el rechazo de la central ugetista a la generación de una *sociedad dual* «entre los que tienen empleo, salario y derechos sociales y los que,

El enfrentamiento llegaría a tales puntos que en un inhabitual editorial de *El País* se advertía de los riesgos de tales conductas. Para empezar, se haría eco de las propias críticas internas dentro del sindicato socialista al respecto del “peligro de transformar el Primero de Mayo en una demostración sindical teñida de los malos recuerdos folklóricos del régimen anterior”. No terminaba ahí: “La anteposición de los intereses corporativistas de las centrales a los intereses de sus representados puede ser explicada tanto por la tendencia de las burocracias sindicales a reforzar su poder como por razones estrictamente políticas”. Advirtiendo, por último, que dada su situación de debilidad, “deberían disuadir[se] de la pretensión de arrogarse un protagonismo exclusivista”⁵².

¿Cómo transcurrió la jornada del martes 1 de mayo de 1984? Primero, sin grandes enfrentamientos que solían darse en aquella misma fecha. En lo relacionado a las cifras, la UGT se quedaría lejísimos de su pretensión de reunir a más de 100.000 personas. El propio *El País* daba entre 15.000 a 20.000⁵³. Por su parte, CCOO conseguía reunir entre 30.000 a 35.000 según las fuentes que se tomarán en cuenta, pero también lejos del cerca de cuarto de millón que se atribuía el propio sindicato. No debe olvidarse que pasados los primeros años de la transición, la asistencia a la celebración de la fiesta del trabajador había ido bajando considerablemente. Como tampoco debe olvidarse la alta conflictividad del I Trimestre de 1984, y el papel adoptado por UGT ya descrito.

En la citada ocasión, González bajaría varios decibelios su ímpetu (neo)liberal. Ni era el día ni el lugar propicio. Lo sabía y así lo supo interpretar. Empero, no dudaría en pedir *comprensión* en el camino emprendido así como *solidaridades varias*. Más allá de algún rasgo de marcado –nuevamente– de *populismo-peronismo* –“cuál es esa política económica que llaman más a la izquierda. ¿La de los países del Este? ¿La de Francia? Que se cojan los resultados y se comparen”– no dejaría pasar la ocasión para deslizar inteligentemente su opción claramente flexibilizadora. Al referirse a los parados de menos de 25 años se mostraría partidario de buscar las formulas más flexibles para lograr su entrada. “Si es por dos años [...] bienvenido sea”. Un mensaje que *escondido* entre los llamamientos a la solidaridad, a la paz social, se constituiría en todo un preaviso –que ya tenía sus antecedentes– de lo que vendría después⁵⁴. Y, al mismo tiempo, se mostraría como las pretensiones liberalizadoras se había visto cortocircuitadas ante los resultados de la RET’84⁵⁵. Precisamente, este último detalle, a pesar de que pasaría bastante desapercibido, se constituyó en el punto clave de la citada intervención.

careciendo de todo esto, viven en una situación de permanente precariedad, desprotección e incluso miseria». Y, por último, hacía un llamamiento de carácter interclasista: «Nuestra reivindicación de solidaridad apela a empresarios y banqueros para que realicen una mayor aportación a la salida de la crisis». REDONDO, Nicolás, “«Solidaridad, más que una palabra»”, *El País*, 1 de mayo de 1984.

⁵² Editorial, “La división del Primero de Mayo”, *El País*, 1 de mayo de 1984.

⁵³ Noticia, Patxo Unzueta, “20.000 personas, bajo las pancartas de la central socialista”, *El País*, 2 de mayo de 1984; y, Noticia, “CCOO superó en poder de convocatoria a UGT en los actos realizados por separados para conmemorar el Primero de Mayo”, *El País*, 2 de mayo de 1983.

⁵⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “El presidente del Gobierno pide a UGT que comprenda y difunda la necesidad de una política económica de ajuste”, *El País*, 2 de mayo de 1984. El ya muchas veces citado cronista laboral finalmente se desplazaría a Bilbao en la caravana organizada por UGT. Véase también, Noticia, Rodolfo Serrano, “Las centrales sindicales celebran por separado los actos conmemorativos del Primero de Mayo”, *El País*, 1 de mayo de 1984.

⁵⁵ Los apoyos de cara a profundizar en el carácter liberalizador/flexibilizador con respecto al mercado de trabajo, no dejaría de repetirse desde todos los centros económicos liberales, empezando por el Banco de España: Noticia, “La inflación es el primer enemigo del pleno empleo, según Mariano Rubio”, *El País*, 15 de mayo de 1984.

Más allá de la exaltación correspondiente por parte de los dos grandes sindicatos sobre sus éxitos en el 1º de Mayo⁵⁶, a nivel organización iría armándose de razones a la par que definiendo sus estrategias. Así desde el CS de CCOO, pasada la citada efeméride, la *desconfianza* seguiría siendo la mayor principal preocupación, más tras valorar la “política actual, de ajuste duro, defendida por el presidente del Gobierno en un acto público en Bilbao”. Calificada la misma como un “fracaso”, se valoraría el qué hacer frente a la posible negociación, que se había abierto gracias a la “fuerte contestación social y presión de los trabajadores”. Para empezar, se exigía como el “interlocutor apropiado de ser el Gobierno”, pero sobre todo debía evidenciarse una “voluntad real de negociación”, que pasaba por la “modificación de la actitud negativa que mantiene la administración” en los diferentes procesos conflictivos. Y en lo referido al temario, se apostaría por modificar la LOLS, la RET’84, la LBE y debatir la política fiscal, la de la Seguridad Social, entre otros muchos puntos, que lógicamente, incluía la forma en que se estaba llevando a cabo la reconversión industrial⁵⁷.

El único punto de común entre UGT y CCOO llegados a esa situación de enfrentamiento, era que el propio Gobierno participará y se fuera a una mesa tripartida. Valorado “positivamente” los “objetivos políticos y sindicales” del 1º de Mayo organizado por UGT en Bilbao, en la reunión de la Ejecutiva del 8 de mayo, se daría un paso más en su estrategia: de las “reuniones paralelas” con Partido y Administración acordadas en la anterior Ejecutiva se pasaría directamente a la necesidad de “clarificar de manera unilateral con el Gobierno las materias objetivos de negociación”. Inclusive se daría otro paso: tratar de negociar lo antes posible los PGE, y para ello se contaba entonces ya con recibirlos el 11 de mayo, y realizar una reunión con “el Gobierno el lunes día 14”⁵⁸. De nuevo, la UGT siempre un paso más allá, inclusive, en este caso dos.

Durante la segunda quincena de mayo y prácticamente durante todo el mes de junio, se volverían a repetir los esquemas de actuación que se vieran al respecto de la reforma del mercado de trabajo durante 1983. Eso sí con una novedad a tener presente. Por un lado, mientras que el fugaz protagonismo del PSOE iría cediendo, sería desde el Ministerio de Trabajo, con Joaquín Almunia en primera línea, desde donde se lanzarían los *globos sonda* más duros y radicales. De hecho, el Equipo Económico de Boyer se mantendría en un plano secundario, dados los recientes antecedentes. Y aquí existen dos versiones. La primera dada por Almunia: “Con Boyer al frente, era prácticamente imposible imaginar un acuerdo con los sindicatos, y me tocó asumir esa responsabilidad”⁵⁹. Y la segunda, y probablemente más cercana a los hechos históricos, el hecho de que UGT “vetó su presencia [la de Boyer] en la negociación del AES”⁶⁰.

⁵⁶ “Realismo y utopía. Camino de la transformación social”, *Unión*, nº 53, (1984), pp. 13-19; “Por el empleo y la paz”, *Gaceta Sindical*, nº 29, (1984), p. 3.

⁵⁷ AHT, CCOO-CC, “Resolución del Consejo Confederal. 8.V.1984”, sig. 2-14.

⁵⁸ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 31. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 8 de mayo de abril de 1984”, sig. 002251-003.

⁵⁹ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, op.cit., p. 171. Una *operación* que según Ricardo Martín, dentro de su permanente visión amable con el biografiado, respondería a lo siguiente: «Es más, Almunia echó mano de su prestigio como antiguo asesor de UGT para defender en más de una ocasión las medidas de ajuste y la reconversión industrial desde posiciones más a la izquierda, ya que Boyer y Solchaga eran, para los dirigentes territoriales del PSOE, ‘esa derecha con la que el PSOE gobierna en coalición’». MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, op.cit., p. 117. Tampoco se puede obviar el apunte que realizaría Alfonso S. Palomares sobre la figura de Alfonso Guerra en esa representación político-estética del primer Gobierno socialista: «Alfonso fue un vicepresidente muy útil para aquel gobierno, porque garantizaba un tono estético de izquierdas que calmaba a las bases radicales del partido y a los dirigentes más ligado a él». PALOMARES, Alfonso S., *Felipe González. El...*, op.cit., p. 291.

⁶⁰ ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del...*, op.cit., p. 196, a partir de, SÁNCHEZ, José Antonio y SANTOS, Roberto, *La Conjura del Zar*, Madrid, Temas de Hoy, 1990, p. 417.

Por otro lado, lo que, en ningún caso, constituiría ningún tipo de novedad, sería la progresiva radicalización de la CEOE en este mismo tiempo, quien se mostraría cada vez más combativa –a pesar de que por medio se produzca el relevo de su cúpula dirigente– a la par que trataría de marcar la agenda negociadora. De hecho, la patronal marcaría sus tres condiciones para llegar a un acuerdo a dos años, pero que, en cualquier caso, debería evitar reproducir el esquema del ANE: incrementar la moderación salarial, junto con el control y la reducción del déficit público. Asimismo se recogería el *guante* lanzado por el propio González el Primero de Mayo: flexibilizar el acceso al mercado de trabajo para los jóvenes⁶¹.

En un tablero cada vez más predecible, rápidamente la siempre poderosa Federación del Metal de CCOO, que afrontaba durante aquellas semanas su Congreso –y en donde no faltarían sonados enfrentamientos entre las diferentes corrientes– se señalaría la imposibilidad de llegar a un acuerdo mientras que siguiera la misma política económica. Todavía más, pues se proponía incrementar la dureza contra la política gubernamental mediante la intensificación de las movilizaciones⁶².

Empezaba, pues, la puesta en escena en lo público y también en lo privado. En *público*, no faltarían las buenas muestras de voluntad por parte de los tres principales implicados, aunque siempre con una mayor predisposición por parte de la UGT. Así en unas jornadas sobre la negociación colectiva, José Luis Corcuera tras evidenciar todo su entusiasmo por la concertación marcaba también un posible calendario: “Ojalá seamos capaces de ponernos de acuerdo en septiembre”⁶³. También a nivel público se conocería antes de finalizar mayo lo avanzado de la Ley de Libertad Sindical en su trámite parlamentario, incluido el paquete de la reforma del mercado de trabajo. En un extenso reportaje de Rodolfo Serrano se hablaba de cómo la futura LOLS, es una “ley hecha a imagen y semejanza de la central socialista”. De hecho, las contrapartidas en torno a la LOLS se emplearían como una baza clave para asegurarse la futura firma de la UGT en el AES⁶⁴. A lo que se sumarían las noticias en torno a las cada vez más cuantiosas ayudas en términos de subvención sindical, según se conocían las líneas maestras del futuro AES⁶⁵.

Pero al mismo tiempo y cuando ni siquiera se había abierto la mesa de negociaciones por los cauces oficiales, CCOO denunciaba a principios de junio las más que habituales

⁶¹ Noticia, “La CEOE participara en la concertación social con la oferta de crear empleo juvenil a cambio de moderación en los salarios”, *El País*, 24 de mayo de 1984; Noticia, “El Gobierno deberá replantear su cuadro macroeconómico, según la CEOE”, *El País*, 28 de mayo de 1984.

⁶² Noticia, “CCOO mantendrá su política de contestación a los planes de reconversión industrial”, *El País*, 15 de mayo de 1984; Noticia, Rodolfo Serrano, “CCOO del metal cree imposible un pacto social con la actual política económica del Gobierno”, *El País*, 21 de mayo de 1984.

⁶³ Noticia, Carlos Funcia, “Patronal y sindicatos, partidarios de un acuerdo interconfederal para 1985”, *El País*, 28 de mayo de 1984.

⁶⁴ Serrano llegaba a señalar en su crónica: «La ley llegó a la mesa de negociación prácticamente consensuada entre el Ministerio de Trabajo y UGT en interminables reuniones nocturnas». Apuntando dos de las grandes conquistas de UGT en aquellas reuniones: la prórroga del mandato sindical y la redacción del criterio de representatividad sindical. Noticia, Rodolfo Serrano, “La ley de Libertad Sindical consolidará a los grandes sindicatos, UGT y CCOO”, *El País*, 28 de mayo de 1984. Justo al mes siguiente se desataría un pequeño escándalo en las Cortes, al conocerse la maniobra del Grupo Parlamentario Socialista para posponer la negociación de la LOLS hasta septiembre, coincidiendo con la negociación del AES. Noticia, Joaquina Prades, “Confusión en el Senado por el intento del Gobierno de aplazar la ley sindical”, *El País*, 28 de junio de 1984.

⁶⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno incluirá en los Presupuestos Generales alrededor de 1.000 millones de subvención sindical”, *El País*, 14 de junio de 1984.

“reuniones secretas” de UGT con CEOE⁶⁶. Ni siquiera UGT lo negaría una vez que sería confirmado por el propio Boyer⁶⁷.

Más allá de la pérdida total de la ética no se sabe si frente a la estética u otras cuestiones más profanas, ¿habría dado frutos la estrategia de UGT a lo largo mes de mayo? En términos prácticos y reales, no. O, al menos, tan conclusión puede deducirse las actas de la CEC a lo largo de tres reuniones durante aquel mismo mes –en concreto la de los días 16, 22 y 29 de mayo–. Pese a los múltiples encuentros con el Gobierno no se alcanzarían los denominados “acuerdos mínimos, de cara a la próxima concertación”⁶⁸. Así se hablaría de seguir perfilando los mismos, el 16 de mayo. No obstante, parecía quedar cada vez claro los puntos sobre los que giraría un posible escenario de diálogo social: “Cobertura de desempleo, Fiscalidad, Pensiones, Empresa Pública, Consejo Económico y Social, Mercado de Trabajo, Patrimonio Sindical y Política Salarial”⁶⁹. A lo que sumaría la creciente preocupación por el cariz que tomaría la reconversión en el sector naval para lo cual en la reunión del 29 se consideraría “conveniente contrastar de manera bilateral dichos proyectos entre el Gobierno”⁷⁰. De esta forma, todo seguía por negociarse y acordarse a finales de junio.

En este panorama de creciente inmovilismo, la reunión del Comité Federal del PSOE los días 2 y 3 de junio, resultaría esclarecedora tanto sobre la posición del Partido como de futuros anuncios en relación al AES. Ello en un fin de semana en el que estaba convocada una gran manifestación contra la OTAN, y en donde aparecería cada vez más palpable la división entre las filas socialistas al respecto⁷¹.

Como se anunciaría ante de la reunión del CF, desde la organización socialista se buscaría, en primer término, salir de la situación de parálisis y de inoperancia desde la última

⁶⁶ En un duro artículo de opinión en *El País* Julián Ariza denunciaba las maniobras del PSOE y del Gobierno en torno al futuro acuerdo social. No se le escapaba al dirigente de CCOO que aquello constituía una operación para llegar a las elecciones de 1986 en un escenario de ‘paz social’. Ahora bien, tal y como se había planteado hasta el momento la negociación, la misma significaría un mayor descenso del poder adquisitivo de los salarios así como «[s]eguir reduciendo las coberturas sociales y la cuota empresarial», sumado a un incremento del tiempo de cálculo para la pensión, profundizar en la privatización de la reconversión industrial, pero sobre todo, «incrementar, si es posible, la llamada flexibilización del mercado de trabajo». A partir de ahí existían muy pocas posibilidades de llegar a cualquier tipo de acuerdo. ARIZA, Julián, “En torno a las conversaciones del PSOE”, *El País*, 11 de junio de 1984.

⁶⁷ Noticia, “CCOO pide explicaciones de los contactos entre Gobierno y UGT”, *El País*, 2 de junio de 1984.

⁶⁸ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 33. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 22 de mayo de 1984”, sig. 002251-003. Un encuentro en donde se denunciaría abiertamente una nuevas como polémicas declaraciones de Solchaga a *Cambio 16*, en donde denunciaría la actitud obstruccionista de UGT al proceso de reconversión: «En este mismo sentido se informó también del análisis reprobatorio que sobre dichas declaraciones ha realizado la CEF del PSOE, haciendo pública su postura de rechazo como Partido hacia dichas declaraciones». No sólo, pues también se decidiría enviar una carta a las Federaciones y Uniones planteando la posición de UGT.

⁶⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 33. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 22 de mayo de 1984”, sig. 002251-003.

⁷⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 34. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 29 de mayo de 1984”, sig. 002251-003.

⁷¹ Noticia, Fernando Jáuregui, “La convocatoria de la manifestación pacifista en Madrid evidencia la división existente en el PSOE sobre la OTAN”, *El País*, 2 de junio de 1984; Noticia, Rocío García, “Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Madrid a favor de la paz y para pedir la salida de España en la OTAN”, *El País*, 4 de junio de 1984; y, Editorial, “Un grito por la paz”, *El País*, 4 de junio de 1984. Nos remitimos, por lo demás, al apartado, “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el *único camino posible* de la economía política socialista?”.

reunión en enero. Especialmente teniendo en cuenta dos factores: primero, la fuerte conflictividad laboral, y, segundo, la necesidad de fortalecer la organización de cara al XXX Congreso a celebrarse en diciembre de aquel mismo año. Y los datos, sin ser negativos, habían dejado de ser exultantes como venía sucediendo desde hacía años. Por ejemplo, se reconocería que unos 10.000 afiliados se había dado de baja tan sólo en 1983, aunque se habían registrado 43.000 altas. Un dato, no menor, para el partido que pretendía hegemonizar la vida política de la nación durante el próximo cuarto de siglo.

Pero es que, además, como se dejaría sobradamente constatado en las más de cuatrocientas páginas del *Informe de Gestión* de la CEF al CF –relativo a los meses de enero a mayo– la preocupación por la situación económica –junto con la “escalada terrorista”– eran patentes. De esta forma, a partir de ese mismo momento la apuesta por la concertación parecía no tener vuelta atrás. Asimismo se volvería a insistir en una de las posibles causas de la falta de legitimidad y/o mala imagen del Ejecutivo: “pueden existir fallos en la tarea de explicación de la política económica del Gobierno”. Un argumento/pretexto que pronto mostraría perezoso tras tantas veces expuesto, pero sobre todo por la sencilla razón de que los porqués y los objetivos de la política económica del Gobierno socialista eran de sobra conocidos⁷².

Sin presencia de los medios de comunicación, y con una *disciplina interna* fuerte, se desconoce –a pesar de disponer del acta correspondiente⁷³– realmente cómo transcurrieron las dos jornadas que duraron el CF, pero sobre todo el *estado de ánimo*, tras los muy difíciles anteriores meses. Probablemente, lo más complicados de toda la “época socialista”, a excepción del otoño-invierno de 1988. Lo que sí se puede deducir tanto por el citado documento como por lo publicado en la prensa es que, justamente cuestión de la línea política económica sería un tema menor en términos conflictivos, ante la cuestión de la OTAN y el problema autonómico⁷⁴.

De lo que no quedaría duda alguna es que el PSOE no se movía de su posición de partida. El propio González lo dejaría claro en la posterior rueda de prensa al CF. Eso sí, con una novedad en términos discursivos. Sin hablar o cuestionar los relativos éxitos de su política económica en el año y medio largo desde su llegada a La Moncloa, no se explicaba cómo “con un crecimiento del 2,2 por 100 en 1983 que en algunas regiones fue el 6 por 100, no se hayan producido nuevas contrataciones”. Tras recordar cómo “estamos haciendo lo que debemos hacer”, aparecerían dos principales sospechosos: el fraude fiscal y a la Seguridad Social, pero sobre todo –he aquí un nuevo ataque a la lógica misma– el Secretario General del PSOE no tendría pudor en firmar como “[h]ay una falsificación estadística de la cifra de desempleados”. Sin aportar constatación o prueba alguna, volvería, por último, a un terreno en donde había demostrado ya sus cualidades “Es verdad que hay un millón de jóvenes en busca del primer empleo, y para los que un contrato temporal no sería nada desdeñable, pero es cierto que junto a ese tremendo problema se está produciendo el gravísimo fenómeno del *empleo sumergido* a niveles muy elevados”. Y aunque la causa-efecto no parecía observarse por ningún lado apostaría, de nuevo y sin ambigüedad alguna, por la flexibilización, y de paso, por la concertación, con una advertencia incluida a la UGT⁷⁵:

⁷² AHFPI, PSOE-CEF, “Informe [de] gestión al Comité Federal de la CEF (enero a mayo 1984)”, Madrid, 1984, Fc 3992, vol. VIII, Fc 3995, vol. IX. Véase asimismo: “La crisis y el paro, principales preocupaciones”, *El Socialista*, n° 359, (1984), p. 3; y, Noticia, “La situación económica del partido, gran preocupación de los dirigentes del PSOE”, *El País*, 1 de junio de 1984.

⁷³ AHFPI, PSOE-CF, “Resumen del acta del Comité Federal. Madrid, 2 y 3 de junio de 1984”, sig. Fc 3915.

⁷⁴ Noticia, Fernando Jáuregui, “González afirma que no todos los procesos autonómicos serán iguales, aunque tampoco habrá 17 modelos distintos”, *El País*, 3 de junio de 1984; Noticia, Fernando Jáuregui, “Felipe González anuncia que el Gobierno clarificará su postura respecto de la OTAN antes de fin de año”, *El País*, 4 de junio de 1984.

⁷⁵ Pocas referencias se realizarían al respecto en la reunión de la CEC el día 5 de junio. A lo sumo se destacaría, como la propia Ejecutiva «podrá participar en la elaboración de algunas ponencias preparatorias para dicho Congreso». Un encuentro, en donde se procedería, por lo demás, a la

«El crecimiento salarial por encima de la inflación genera paro. Por debajo no está demostrado que genera empleo en un plazo inmediato. Habrá que experimentarlo todavía para poderlo medir con exactitud»⁷⁶.

De *vuelta* al terreno negociador, y en este caso al de las propuestas, no habían faltado desde el mes de marzo –coincidiendo con el inicio del trámite parlamentario de la RET’84– los anuncios, más o menos concretos, de *flexibilizar al máximo* la contratación para los jóvenes. El martes 12 de junio se materializaba todos los anuncios previos a través de unas contundentes declaraciones de intenciones por parte del Ministerio de Trabajo –quizás animado por la filtración del entusiasta informe que se conocería en aquellos días de la OCDE y del FMI apoyando la política económica socialista y en que se apostaba, además, por una flexibilización laboral radical⁷⁷– en lo que sin duda se constituiría en el gran globo sonda laboral de aquel año⁷⁸. Almunia anunciaba la preparación de un amplio decreto que afectaría el acceso a los jóvenes de entre 16 a 20 años. La receta era la misma que en ocasiones anteriores, pero todavía más dura en términos de flexibilización liberal: eliminación en la práctica de cargas de las cotizaciones sociales para los empresarios de cara a que tan sólo tuvieran que abonar –y a un precio reducido– las cuotas correspondientes al desempleo y accidentes de trabajo. Además aquella fórmula que se estaba estudiando para una población comprendida de cerca de un millón doscientos mil jóvenes, establecía todavía una mayor rebaja en los salarios –el 80% de la cotización mínima por categoría–. En cuanto a su duración se amplía de 3 a 6 meses y de 2 a 3 años en sus mínimos y máximos, a la par que se eliminaban todos los obstáculos con los que se había pretendido evitar su uso fraudulento. Siendo conscientes de los riesgos de tal jugada, tan bien se dejaría caer una *jugosa* contrapartida para los sindicatos que había sido empleada en más de una ocasión: “ayudas presupuestarias que el Gobierno está dispuesto a conceder a las organizaciones obreras. Y eso a pesar del mal efecto que puede causar la imagen de cambiar

convocatoria del II CC ordinario para los días 29 y 30 de junio: AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 23. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 5 de junio de 1984”, sig. 002251-003.

⁷⁶ “Sin fraude, el déficit público sería cero”, *El Socialista*, nº 360, (1984), p. 3.

⁷⁷ Entre otras cuestiones se resaltaba en aquel informe como «no existe alternativa viable a la estrategia» seguida; «lo más importante está por hacer». De hecho, desde el Gobierno todavía se mostrarían más contundentes. Miguel Ángel Fernández Ordóñez decía: «no habrá cambios ni medidas correctoras» con respecto a la política económica. Pero ante todo se destacaba en el *informe* de marras como se tenían que seguir realizando «esfuerzos conducentes a contener el aumento de los costes de mano de obra [...] [R]esulta indispensable el mantenimiento de una moderación salarial». Lo que todo traducido llevaba a un apoyo explícito de la flexibilización del mercado: «Una mayor flexibilidad del mercado laboral resulta necesaria, no sólo para asegurar una moderación de los salarios sino también para conseguir una relación más estrecha entre salarios, productividad, cualificaciones y la situación financiera de las empresas. En consecuencia, interesa que [...] las vigentes reglamentaciones restrictivas relativas a la mano de obra, en especial las disposiciones que rigen las contrataciones y los despidos, sean considerablemente flexibilizadas». Noticia, Alberto Valverde, “La OCDE ratifica que no existe alternativa viable a la política de ajuste que aplican las autoridades españolas”, *El País*, 9 de junio de 1984. En los siguientes días un editorial de *El País*, tras criticar la filtración y el entusiasmo descarado del Gobierno por lo que decía el informe del FMI, aconsejaba cierta moderación al mismo Ejecutivo ante las consabidas recetas. Concluyendo el mismo de la siguiente forma: «No obstante, hay que reconocer, y el gobierno ha de ser particularmente sensible a ello, que los rigores del ajuste económico están siendo fundamental sufragados por determinadas regiones de España y por las capas sociales menos favorecidas». Editorial, “La economía española y el dictamen de los expertos”, *El País*, 11 de junio de 1984. Y unos días también publicaría otra *nota de opinión* más dura que la anterior al respecto: Editorial, “El paro, la pobreza y la economía sumergida”, *El País*, 3 de junio de 1984. Al respecto véase los ejemplos expuestos a lo largo del Capítulo “7. La segunda fase de la reestructuración del capitalismo español (1982-1992). Del «feliz» como «precario» equilibrio macroeconómico a la eclosión del modelo de crecimiento”, y en concreto en la *nota* 325.

⁷⁸ Véanse los propios avisos de Almunia unos días antes. Noticia, “El paro seguirá muy alto durante los próximos 10 años”, *El País*, 26 de mayo de 1984.

flexibilidad de trabajo por dinero”, según se podía leer directamente en *El País*. La historia del ANE se repetía pero con un listón flexibilizador cada vez más alto⁷⁹.

Lo que, se volvía a poner de manifiesto, por tanto, eran las renovadas intenciones del Ejecutivo, con Trabajo a la cabeza, de modificar radicalmente la política de empleo juvenil. Más aún cuando se repasan con atención las declaraciones del propio Presidente en marzo de 1983 o las propias limitaciones por donde transcurría las negociaciones entre octubre a noviembre de la RET’84 durante el mismo año ochenta y tres. A lo que se añadirían las otras tantas manifestaciones públicas de marzo o de mayo por parte del mismo González ya en 1984. En realidad, lo que nos encontramos aquí es ante el punto de origen del futuro PEJ, que aprobaría en un Consejo de Ministros a finales de octubre de 1988. Una obsesión flexibilizadora destinada a los jóvenes que tardaría, ni más ni menos, que cinco años en presentarse como una propuesta normativa, y justo cuando las relaciones de la familia socialista se habían fracturado⁸⁰.

Al día siguiente de conocerse las declaraciones de Almunia, y reunida la CEC de UGT, las mismas ni siquiera serían objeto de atención ni de análisis. ¿Tenía, de nuevo, la Ejecutiva información privilegiada previa? No se puede descartar como veremos en las siguientes páginas. Pero lo que realmente empezaba a preocupar a la central socialista era la “aparente apatía” que sobre el retraso en la apertura de las negociaciones así como del menor ritmo de negociaciones, bilaterales, unilaterales, reservadas, secretas...⁸¹.

No eran pocas las esperanzas depositadas en dicho posible “Acuerdo Marco”. Además de concretarse otra reunión entre González y Redondo –entre el 12 al 26 de junio– en donde se buscaría “clarificar y racionalizar la negociación colectiva para los próximos dos años”, aunque sin mayores compromisos según se recogería en el acta de la siguiente reunión⁸²; se sacaría asimismo una nota de prensa el martes 12 marcando muy claramente cuáles eran los tres terrenos sobre los que se podía negociar, dentro de su muy debilitada tesis del *sacrificio solidario de la clase obrera*. Dispuestos a nuevos sacrificios que parecían no tener fin, por un lado, planteaba su participación en un acuerdo social en base a medidas para la creación de empleo cuantificado; por otro, aceptaba una vez más la receta de la contención salarial con sus correspondientes compensaciones en base a sus tesis congresuales en torno al *salario social*. Y, por último, las anteriores cesiones deberían tener su correspondiente contraprestación a través de una mayor presencia sindical en los centros de trabajo⁸³.

⁷⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Ministerio de Trabajo preparara nuevas medidas para facilitar la contratación temporal de los jóvenes parados”, *El País*, 12 de junio de 1984. Lo que todavía hoy se desconoce es el grado de conocimiento que desde la UGT se tenía sobre esta propuesta primigenia. Por lo demás, días después el propio Almunia insistía en las virtudes de la propuesta del Gobierno y la voluntad política de llegar a un acuerdo social. Noticia, “Almunia anuncia ante la OIT que el Gobierno propiciará la concertación social”, *El País*, 12 de junio de 1984.

⁸⁰ Véase lo apuntado al final de la *nota 71*.

⁸¹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 36. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 12 de junio de 1984”, sig. 002251-003. Una reunión en donde se reafirmaría como muy positivo el trámite del *pack legislativo* sobre mercado de trabajo acordado con Trabajo en noviembre de 1983, citándose inclusive a la propia RET’84. De hecho, a lo largo de la segunda quincena *Unión* y *El Socialista* lanzarían sendos números con amplios reportajes y separatas sobre la LOLS. Todo ello como una reforma que aseguraría el *avance* de la clase obrera en su conjunto: “Ley de libertad sindical”, *El Socialista*, nº 360, (1984), pp. 7-10; “Ley de libertad sindical”, *Unión*, nº 54, (1984), pp. 1 y 3.

⁸² AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 37. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 26 de junio de 1984”, sig. 002251-003.

⁸³ Noticia, “UGT defiende el pacto social con sacrificios salariales”, *El País*, 13 de junio de 1984. Un comunicado que también se publicaría en: “¿Para cuándo la concertación?”, *Unión*, nº 55, (1984), p. 6. Un número en donde se incluía también otro artículo de opinión, que salía al paso de ciertas críticas gubernamentales a la par que empresariales sobre el déficit público. Lo que evidenciaba, en suma, como

Ni con anuncios ni sin anuncios de por medio, reuniones secretas o no, junio avanzaba y parecía confirmarse la incapacidad de pasarse de la fase, un tanto virtual, de la pre-negociación del AES. Y, mientras tanto, continuaría la interminable toma de posiciones. Pero será en este mismo intervalo de tiempo cuando tengan lugar relevantes sucesos, que marcarán el *ritmo* y las *estrategias* frente a la ofensiva liberalizadora del Gobierno que se encuentra detrás del AES.

Por su parte, la CEOE aclaraba más claramente cuál era su gran objetivo: influir en los Presupuestos Generales del Estado de cara a reducir el déficit público⁸⁴. Con CCOO prácticamente desaparecida del escenario político-mediático durante la segunda quincena de aquel mes junio, en tanto afrontaba con no pocos problemas el desarrollo de su III Congreso Confederal; tanto desde el Ministerio de Trabajo, como desde CEOE y UGT seguirían –a su ritmo– conspirando en secreto como enviándose mensajes en las salas de prensa de la Asociación para el Progreso de la Dirección como en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Lugares públicos ya consagrados para tales empresas en donde explayarse.

El 19 de junio, en un intento por desatascar el ritmo pre-negociador, y en donde cada vez crecía más la sensación como desde el Gobierno no se quería o no se podía dar el pistoletazo de salida oficial a las negociaciones, tal y como se venía denunciando la CEC de UGT; Joaquín Almunia en la APD anunciaba nuevas reuniones de cara a lo que, en un primer término, se denominaría el “Acuerdo Macroeconómico Social”. El posible calendario manejado en dichas circunstancias: antes de que se aprobarán los Presupuestos Generales. Por su parte, el miércoles 25 de junio, José María Cuevas, José María Zufiaur y Segismundo Crespo escenificaban en Santander, durante un seminario titulado, *Economía y medios de comunicación en España*, la necesidad de un pacto social. Con la memoria viva reciente muy presente sobre lo acontecido en octubre y noviembre del año anterior– “[N]o justifica, a la luz de los resultados obtenidos, que aquél [el *pack* de la reforma del mercado de trabajo] no se alcanzará [un acuerdo]”, señalaría Crespo– así como con los *coletazos* todavía presente de la fuerte conflictividad del primer trimestre; desde el Ministerio se marcaban algunas líneas rojas de lo tocable y lo intocable: por un lado, *moderación salarial y medidas de fomento del empleo*, junto con otros clásicos temas; en el lado, de lo intocable, los tres elementos de la reforma del mercado de trabajo del ochenta y tres⁸⁵. Unas afirmaciones que no resistirían durante mucho el paso del tiempo.

La respuesta a las causas de porque no arrancaba el proceso negociador pronto se sabrían. El 28 de junio saltaba a la prensa la posibilidad de la primera crisis ministerial de la “era González”⁸⁶. Aunque aquello se quedaría sin consecuencias prácticas, se transformaría en una de las primeras señales del *desgaste* del Gobierno, tras quince meses en el poder y a seis para el XXX Congreso socialista. No era la primera vez que se rumoreaba una crisis, pero la primicia que daría Fernando Jáuregui iba más allá, al menos en cuanto a datos, causas y nombres.

desde UGT se había optado ya por evitar el silencio o la omisión pública de determinadas cuestiones sensibles: “A cuenta del déficit”, *Unión*, n° 55, (1984), pp. 4-6.

⁸⁴ Noticia, “No habrá concertación social sin plantear íntegramente la estrategia presupuestaria del Gobierno, según CEOE”, *El País*, 15 de junio de 1984; y, Noticia, Gustavo Matías, “La patronal CEOE está más interesada en reformar los Presupuestos Generales del Estado que en el pacto salarial”, *El País*, 22 de junio de 1984.

⁸⁵ Noticia, Víctor Gijón, “José María Cuevas considera necesario un pacto social que fomente la inversión y el empleo”, *El País*, 26 de junio de 1984.

⁸⁶ Nos remitimos aquí a lo apuntado en su momento en el apartado “5.1. Las *idas y venidas* en el Consejo de Ministros: breve y ajustado relato de la composición de los gobiernos socialistas en la «década del cambio»”.

Una exclusiva a la que se acompañaría de una potente campaña editorial por parte de *El País* con sucesivos editoriales en los días siguientes⁸⁷. Citando fuentes gubernamentales, se hablaba de “ambiente de crisis”. Como siempre se planteaba tal remodelación como una “mejora de funcionamiento” y sin autocrítica ninguna en temas de gestión de lo político. Reconociendo el peso político de González, Guerra pero sobre todo Boyer –preocupado en última instancia por un posible cese de su *mano derecha* Solchaga, por el cariz que estaba tomando la reconversión– y más allá de otros movimientos de primera fila, se cuestionaba seriamente la continuidad de Enrique Barón –quien se había enfrentado en más de una ocasión al Equipo Económico– Tomás de la Quadra-Salcedo pero sobre todo de Joaquín Almunia. Sin duda la gran novedad en las quinielas ministeriales. A pesar de anunciarse como un simple “traslado” a Administración Territorial, también se dejaba caer como posible causa los “tropiezos sufridos por el proyecto de la Ley de Libertad Sindical”. El nombre del sustituto volvía a ser José Luis Corcuera. En cualquier caso, se dejaba muy claro que con aquellos posibles cambios no supondrían “un cambio de rumbo de la política de saneamiento económico”⁸⁸.

En un tono bastante *radical* y subido de tono –algo del todo inhabitual– Nicolás Redondo presentaba un largo como contundente *informe de gestión* al 2º Comité Confederal Ordinario un 29 de junio de 1984. Si en enero de aquel mismo año había tocado explicar mediante una narración de los hechos a la “mejor luz posible” del lado ugetista –en lo que no dejaba de ser una interesada interpretación de los hechos, a fin de cuentas– su posición pactista y progubernamental en el *pack legislativo* de noviembre de 1983, junto con los errores cometidos durante la negociación del AI '84; seis meses y medio después, la gestión a presentar también se mostraba complicada: acaso, ¿Redondo y la dirección ugetista hablarían de su política desmovilizadora durante el I Largo Trimestre de 1984? O, ¿de los “acuerdos por arriba” con el Gobierno para garantizarse una serie de contrapartidas en este sentido? Y de cara a la futura negociación, ¿se retomaría la vieja estrategia de endurecer posiciones frente al Ejecutivo y al resto de los interlocutores sociales para evidenciar que UGT era un sindicato, además de *responsable* y *negociador*, una central de clase, combativa que no iba a seguir permitiendo que los asalariados perdieran poder adquisitivo? Y lo que quizás, era más relevante, ¿el progresivo incremento de las críticas contra la dirección volverían a reaparecer? ¿Se volvería a cuestionar los métodos negociadores así como los contenidos? ¿Hasta qué punto influirían dichas críticas en la estrategia ugetista?

Convocados los miembros del CC los días 29 y 30 de junio de 1984 en el Hotel Chamartín (Madrid) –un lugar frecuente de conspiraciones de la familia socialista– a las 10.00h

⁸⁷ Dos en concreto. El primero, el mismo día 28. Allí se hablaba como el «Poder Ejecutivo ha cometido, a lo largo de este período, bastantes errores y considerables deslices, a la vez que algunas de sus medidas [...] le han enajenado los apoyos de sectores de su electorado, tanto por la derecha como por la izquierda». Editorial, “En busca del centro”, *El País*, 28 de junio de 1984. El segundo, publicado al día siguiente, *El País* no escatimaba en adjetivos ni propuestas: «Pero si tal fuese la explicación [batir la *marca de estabilidad gubernamental*] de que Felipe González haya conservado en sus puestos a responsables de carteras que han demostrado desde hace tiempo su incapacidad, no resultaría fácil disculpar al presidente por haber incumplido su firme promesa [...] de destituir a los inútiles tan pronto como sus desaciertos quedarán refrendados por los hechos». Sin querer entrar en mayores especulaciones, no obstante, apuntaba como la principal causa de la crisis la siguiente: «los conflictos surgidos dentro de determinadas áreas de gobierno –fundamentalmente la económica– como consecuencia de las resistencias mostradas por miembros secundarios del Gabinete a la hora de cumplir las directrices recibidas». Y concluía aquel esclarecedor editorial: «El eventual sacrificio de Almunia o Solchaga –reciclando sus funciones en otras zonas del aparato del Estado– para conseguir mejores niveles de entendimiento con UGT no representaría un viraje estratégico de la política económica gubernamental sino un acomodo para aliviar las deterioradas relaciones con la central socialista». Editorial, “Reajuste o crisis”, *El País*, 29 de junio de 1984.

⁸⁸ Noticia, Fernando Jáuregui, “Felipe González prepara su primer «reajuste» de Gobierno para antes de las vacaciones”, *El País*, 28 de junio de 1984. E igualmente, Noticia, “La crisis ministerial será un «lavado de cara» del Gobierno”, *ABC*, 29 de junio de 1984.

de la mañana, entre otros puntos del orden del día estaba la gestión de la CEC y la toma de posturas y decisiones con respecto a la “política de concertación y negociación colectiva”⁸⁹.

En nombre de la CEC, Redondo subiría a la tribuna a presentar el correspondiente informe de la Secretaria General, que previamente se había discutido en más de una ocasión en la misma Ejecutiva. No defraudó como destacarían los propios medios de comunicación. El líder de UGT brindaría todo un discurso dentro del denominado *realismo mágico* –versión sindical– en donde las *derrotas* se convertirían en *victorias* y los posibles fracasos obedecían a conspiraciones (comunistas) por doquier contra la central socialista. En un duro tono crítico que hasta entonces no se conocía en boca de Redondo durante el inicio de la época socialista, comenzaría planteando: “[E]s necesario realizar una crítica revisión de lo sucedido y proponer a los compañeros líneas de actuación para el futuro”. ¿Tenía sentido lo debatido y aprobado en enero?, se interrogaría. Parecía que no, en tanto se hablaba de “medidas correctoras”. ¿Cuál era el motivo?

«El momento político tiene como nota dominante una cierta situación de escepticismo que afecta no sólo a los compañeros de nuestra organización y del PSOE, sino también a otros sectores de la izquierda que deberían apoyar una gestión socialista como única alternativa a la derecha. El motivo de este descontento puede resumirse en que el Gobierno no da total cumplimiento al programa de Gobierno que sometió a la consideración de los ciudadanos y que fue respaldado por éstos en una mayoría sin precedentes».

Hasta entonces nunca se habían empleado argumentos de tal calibre contra el Ejecutivo. En todo caso, se pedía no caer en el “escepticismo” y menos en el “derrotismo”. Se podía rectificar y así se trataría que fuera. Y también se dejaría ampliamente constatado su rechazo a los frecuentes “calificativos de «Gobierno de derechas»”. Entonces, ¿por qué la falta de cumplimiento, la desconfianza latente más aún cuando la propia Ejecutiva lleva reuniéndose durante meses con la Administración sin mayores enfrentamientos aparentes? Quizás, ¿tocaba marcar distancias? Lo cierto es que, tras una introducción tan tenebrosa, el repaso por la actividad gubernamental –de “nuestro Gobierno”, según la expresión ugetista correspondiente– no parecía tan alarmante. Incluso se deslizaba –o nos preguntamos, ¿sería un desliz? – como un aspecto positivo como la RET’84. Cuanto más avanzaba Redondo más claro parecía que pocas eran las críticas hacia lo que se calificaba como un “política de izquierda que asumimos”.

Sin todavía entender las “sombras” iniciales señaladas en los primeros compases del discurso de Redondo, se pasaba a denunciar las pérfidas maniobras de acoso al conjunto del socialismo español, desde la izquierda a la derecha, incluido “un sector importante de la burguesía, con el apoyo de órganos estridentes”. Y con ser grave lo anterior, el principal peligro lo seguía constituyendo la oposición radical de *signo comunista*, que tanto juego daba al entorno socialista para desviar la atención y cargar los fracasos al citado *chivo expiatorio*. En un tono más agresivo, inclusive que el empleado en enero, en que en un gesto de patriotismo sindical se darían por finiquitadas las relaciones con CCOO, se volvían a cargar las tintas en la misma dirección:

«Por su parte el Partido Comunista persiste en su política de acosar al Gobierno a través de CCOO, prácticamente una política de agitación y de planteamientos maximalistas para disimular sus contradicciones internas».

Mismos argumentos y muy similares palabras para volver a agitar el *fantasma comunista*, que según la propia UGT debía vincularse, de forma obligada, al fracaso del AI’84, la extensión de la contratación temporal y un sinfín de temas. En suma, CCOO *no era de fiar*, más ante sus “luchas internas” que invalidaban su “capacidad como interlocutora”. Significativamente no se hablaría ni de la actuación de la central socialista durante el AI’84 o su política desmovilizadora durante la oleada conflictiva. Identificado el enemigo –en una

⁸⁹ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Organización, “Circular n° 12”, Madrid, 5 de junio de 1984, sig. 2606-003.

versión de los hechos bastante dicotómica— tocaba glosar la capacidad de sacrificio y de lucha de la organización en episodios políticos de primer orden:

«La Unión General de Trabajadores adoptó la resolución de celebrar el 1º de Mayo con el carácter de fiesta reivindicativa enmarcada en el concepto de solidaridad en Bilbao. La concentración socialista en esa ciudad fue un éxito porque dio muestra de solidaridad de todos los trabajadores de todos los pueblos de España y constituyó una afirmación de nuestra presencia frente a los que fomentan el resentimiento y practican el terror».

Tampoco parecía que tenía mucho sentido remarcar las diferencias con el Gobierno por ciertas declaraciones, pese a la preocupación mostrada por la UGT e inclusive en el número de *Unión* correspondiente a la segunda quincena de mayo. *Era agua pasada*, que diría el refrán, especialmente ya que se “presta a cierta manipulación”. En resumen, “para nosotros ha sido claro que no tenemos enfrentamientos personalizados sino que consideramos globalmente el comportamiento del Gobierno, que hemos criticado y criticaremos toda medida que entendamos regresiva o incompatible con el planteamiento socialista”.

Con la vista puesta al futuro inmediato, además, todo parecía marchar en positivo. O, al menos, así lo parecían evidenciar los datos y variables macroeconómicas, empezando por la inflación. Se compartía pues con el Ejecutivo su visión del “éxito” económico tanto en materia de déficit exterior como de inflación. No sólo, pues se compartía dicho “buen camino para recuperarnos de la crisis”.

Llegado el momento, y a la hora de entrar en el terreno de la política laboral, además de evitar notas negativas o hablar directamente de *fracasos*; se limitaría a hablar de una situación “por sí suficientemente grave”. No cuestionando —ni parcial ni globalmente— la política hasta entonces emprendida, la receta era la misma: “una actitud de moderación salarial de los ocupados”, con las correspondientes contrapartidas de cara a garantizar el crecimiento del gasto global. Sin embargo, al menos, se tendría la sinceridad suficiente para señalar como la creación de los 800.000 puestos de trabajo prometidos en el programa electoral, iban de ser difíciles de alcanzar. En concreto, se afirmaría: “debemos admitir con franqueza la práctica imposibilidad de lograrlo en la presente legislatura”.

Sin que se dedicara una sola línea a la conflictividad obrera de los meses anteriores, el problemático asunto de la reconversión se resolvería en dos folios. No sólo se había tenido que luchar contra la “actitud poco o nada flexible de algunos departamentos ministeriales”, sin mayor crítica ni mención a Solchaga; sino ante todo se había tenido que salir al paso la de “actitud lamentablemente destructiva y demagógica de CCOO”. Los demás aspectos tratados iban a *cuenta de inventario* de la UGT en el lado de los éxitos. De “notable éxito” también se calificaría la actitud de UGT ante la negociación colectiva una vez que se había frustrado el AI’84. Quizás se reforzaría la presencia y responsabilidad del “enemigo” o “enemigos”, en ese suma y sigue del *realismo mágico socialista* versión sindical-ugetista: “En síntesis, creemos que hemos sido el centro de una maniobra de pinzas que los demás interlocutores, por distintas razones, practicaron”. El victimismo de la UGT subía así un alto peldaño.

Si hasta aquí lo escuchado entraba dentro de la sintonía esperable, pese al pequeño *tropiezo* de radicalismo verbal inicial solventado en los siguientes minutos; tampoco chirriaría el discurso de Redondo cuando tocaría defender a ultranza una “concertación profunda”, como la mejor “manera de canalizar el enorme esfuerzo de solidaridad que requieren la mayoría de los problemas socio-económicos de la España actual”. De entrada, y sin mayores vacilaciones, se hablaría también de la necesidad de apostar por un *nuevo* “sacrificio solidario” vía *moderación salarial* —eufemismo para encubrir, como ya sabemos a estas alturas, la pérdida de poder adquisitivo—. Las condiciones para tal nuevo *sacrificio* que se pediría a los asalariados sonaban familiares: una política que “realmente” sirviera para la creación de empleos, principalmente por la vía fiscal; segundo, reparto de los sacrificios ante una “posible recorte de sueldos”; y tercero, medidas destinadas a incrementar la participación de los trabajadores en sus centros de trabajo.

Clarificado el panorama de los futuros sacrificios y denigradas las posiciones de CCOO de cara a la posible negociación que se abriera –sin mencionar absolutamente nada de las reuniones bilaterales con el Gobierno y/o la Administración– se afirmaría en un tono grandilocuente: “UGT, claro está, no acepta imposiciones”. En realidad, no se especificarían ni se explicarían con profundidad lo negociado hasta el momento de cara a llegar a un “acuerdo por arriba”. A lo sumo, se dejaban caer temas “amables” sin mayor resonancia”. Llamativo sería el tono moderado que se emplearía para salir, por primera vez, a defender ante el CC la RET’84y hablar como para la UGT se había tocado el *techo de la flexibilización*. Un *tono moderado* ante la ofensiva radical gubernamental que pronto, muy pronto, se desataría:

«En materia de contratación consideramos como la reforma del Título Primero del Estatuto de los Trabajadores flexibiliza suficientemente la posibilidad de hacerlo introduciendo, con las debidas cautelas, figuras nuevas como el contrato temporal por nueva actividad y el contrato de relevo. Además, se clarifica y mejora la normativa anterior en materia de contratos temporales. En esta cuestión es evidente que en lugar de pensar constantemente en nuevas formas flexibilizadoras que perjudican a los trabajadores y no crean empleo, hay que explotar al máximo las posibilidades de las formas de contratación que ya existen y que son muchas veces desconocidas por los empresarios».

Y antes de entrar a valorar el último trámite parlamentario del *pack legislativo* de noviembre de 1983 –de nuevo, en una suma imparable de evidentes éxitos, en donde no había resquicio no a la crítica sino a la duda– se volvería a recuperar cierta parte del *radicalismo verbal* inicial en la última parte de cara a la negociación del AES. Exacerbados los *ánimos* se avisaba con cierto tono de pesimismo en una escenificación militante tantas veces ensayada y puesta a prueba:

«Con franqueza, diremos que no existen buenas perspectivas que las negociaciones culminen con éxito, porque por un lado existe la misma rigidez ya comentada en la postura del gobierno sobre los incrementos salariales y por otro, se nos pospone una pérdida de poder adquisitivo para 1985 sin contrapartidas clara en materia de prestaciones sociales que garanticen el salario global de los trabajadores».

Pero sobre todo para la UGT el máximo riesgo –real como veremos y examinaremos atentamente– era, en aquellas alturas, que el Gobierno pretendiera también que se negociará en el futuro AES el tema de las reforma de pensiones, lo que sin duda significaba abrir un *nuevo frente* en una situación de inestabilidad como de debilidad: “Constituye, por otra parte, un obstáculo importante la postura oficial de desvincular la reforma normativa sobre pensiones del marco de las negociaciones en curso”⁹⁰.

Destacaron los medios en aquella ocasión algunas declaraciones fuertes –con no pocas muestras de pobre populismo cuando no de manifiesto victimismo– del Secretario General. Así fue como acabamos de ver, aunque lejos del *radicalismo* destacado, por más que no se dudaría en marcar las necesarias diferencias. En realidad, todo era más sencillo de explicar cuando nos internamos por la lógica discursiva ugetista: se trataba, simplemente, de un endurecimiento tan repentino como cortoplacista cuando se aventuraba el inicio oficial de las negociaciones del AES⁹¹.

Prestó también las páginas de *Unión* destacarían en la propia portada como la gestión de la CEC se aprobaría por “unanimidad”. Como por “unanimidad” también se aprobaría la estrategia a seguir. A partir de un apretado resumen de la intervención del propio Redondo, destacando lo que se denominaban como las “condiciones para una concertación”, se destacaría

⁹⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria General, “Informe de Gestión que presenta la CEC al II Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 29 y 30 de junio de 1984, sig. 2606-004, pp. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Junto a un larguísimo informe de la Secretaria de Imagen, se incluirá también el informe de la Secretaria de Acción Institucional, sobre el que volveremos más adelante.

⁹¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT culpa al Gobierno, a la patronal y a CCOO, de que no hubiera acuerdo en 1984”, *El País*, 30 de junio de 1984.

lejos de lo dicho por el Secretario General –como elemento de novedad a valorar oportunamente– como la “crisis [del Consejo de Ministros] debe producirse cuanto antes y los próximos Gobiernos que vengan deben cumplir el programa electoral que llevó al poder al PSOE”. Incluso se dejaría más claramente constatado que en el *informe de gestión* de Redondo los incumplimiento de los denominados “pactos firmados”. Y ello sin ningún tipo de eufemismo. Aunque no concluiría ahí la glosa al II Comité Confederal, poco o nada se decía que pudiera dar a entender cualquier tipo de enfrentamientos o visiones dispares⁹².

Como hemos destacado en más de una ocasión, una de las derivas más significativas de la *dialéctica socialista* –tanto en su versión política como sindical– sería la doble capacidad de comprimir en unos cuantos folios –3 a 6, en términos generales– dos días debates, sin apenas ofrecer rastro de los mismos y menos evitando que sobresalieran las críticas o las intervenciones menos amables con la dirección; a lo que se sumaría, del mismo modo, el evitar que las posibles discrepancias salieran en los medios de comunicación. A lo sumo se ofrecía de cara a la militancia, y ello en formato “oficializado”, la versión oportuna a transmitir en un ejercicio de militancia y disciplina a considerar. Así sucedería también en este caso, aunque también se ha de remarcar como en esta ocasión en la mesa presidida por Matilde Fernández, Santiago Nieves –Secretario de Actas– y Miguel Ángel Rubio –Secretario de Notas– decidirían explayarse de forma más detenida que en anteriores ocasiones.

De hecho, sin recoger, a buen seguro, toda la intensidad que rodeó la celebración del II Comité Confederal de UGT, la citada acta nos aporta un cuadro clarificador cuando se lee detenidamente la misma. Lejos de la pretendida *unanimidad*, las críticas que se venían oyendo desde antes del XXXIII Congreso y que se habían vuelto a observar en enero, redoblarían su virulencia contra la forma de proceder y gobernar la organización por parte de la Ejecutiva. Todo un adelanto de lo que sucedería durante el mes de octubre, cuando se asistiría a la primera gran batalla dentro del CC. Un futuro *enfrentamiento* debido, en gran parte, por el aquí denominado *factor Corcuera*.

Así, y finalizada la intervención de Redondo, más allá de temas internos y otros paralelos, se harían constar un conjunto de serias discrepancias –por más que no se les dedicarían un par de líneas en el acta citada. Entre otros intervendrían Manuel Ventura, para advertir como la “falta de acuerdo en el presente año nos ha llevado a una situación de incomprensión con las gentes”. Más agudo como crítico se mostraría, una vez más, Justo Fernández. Denunciaría como no se debían manipular o engañar a los miembros del CC sobre las causas y responsables de la falta del AI’84. Si este no había llegado a buen puerto, era, sencillamente, por la falta de “voluntad política del Gobierno”, lo que había conducido a que la UGT estuviera “pagando los platos rotos” de la familia socialista. Como criticaría que “no estuvo bien organizado el 1º de Mayo”. Tampoco desaprovecharía la ocasión para advertir como Redondo había pasado con inusitada velocidad por el punto de las pensiones y el AES.

Según avanzaba la reunión las atenciones se centrarían progresivamente en la denuncia de la falta de información de las relaciones entre Gobierno y UGT, pero sobre todo por un hecho que volvía a repetirse por segunda vez y de forma consecutiva: la ausencia del informe correspondiente de Acción Sindical, a cargo de Corcuera. ¿Casualidad? O, por el contrario, ¿una estrategia perfilada previamente? Curiosamente, en ninguna reunión antes y posterior de la CEC, se detendrían en denunciar este claro incumplimiento de los compromisos. Manuel Garnacho, quien pese a la proximidad con la dirección, empezaba a desconfiar también de Corcuera, criticaría, asimismo, la ausencia de cualquier tipo de estrategia de cara a la negociación colectiva pasada y futura. Antonio Puerta, otro oficialista, tampoco dudaría en advertir el alejamiento progresivo de UGT tanto de la realidad como de los trabajadores. A lo

⁹² “II Comité Confederal Ordinario. Aprobada por unanimidad la gestión” (pp. 1 y 5-6); “La concertación necesaria. Radiografía sindical del país” (pp. 3-4); “Negociación colectiva y concertación” (8), todos ellos en *Unión*, n° 56, (1984). Asimismo se incluía una amplia revisión de la marcha de la negociación colectiva: “Balance de la negociación colectiva” (12-13), en donde se repetían todos los argumentos, sin variación alguna, mantenidos hasta el momento.

que se añadirían otras tantas intervenciones de diferentes Uniones y Federaciones que advertirían de un hecho que siempre se trataría de evitar que se hiciese público: la “sangría” de afiliados, especialmente de las grandes empresas, que se pasaban a Comisiones Obreras.

Tenso pero seguro, Corcuera replicaría, tras pedir disculpar formales por la falta del documento. Dicho esto, alegaría a su favor como no era necesario presentar informe alguno, ya que estaba recogido en el propio informe de la Secretaria General. ¿Falta de estrategia? Al contrario. Zufiaur, por su parte, trataría de quitarle importancia al tema de las pensiones, destacando como lo primero era definir una posición, sin más detalles. Tampoco por ahí habría mayores autocríticas a la estrategia seguida, que valorada como positiva, finalizaba con una enigmática conclusión: “Estima que es preferible perder votos que retirar el apoyo al Gobierno”. Saracíbar, igualmente, no veía mayores problemas de organización, y de hecho, si ha habido problemas en el 1º de Mayo o en la manifestación de la OTAN, la responsabilidad era de las Uniones territoriales. Que la Ejecutiva parecería ser infalible, parecería confirmarse con la también intervención de Redondo en el turno de replicas denunciando, por activa y pasiva, que los problemas por los que había atravesado la UGT se debía a una conspiración en mayúsculas en base a una “pinza” contra el sindicato socialista. Cierre de filas y aprobación por unanimidad.

Igualmente tampoco le resultaría sencillo a la Ejecutiva explicar los contenidos de las conversaciones con el Gobierno de cara al futuro AES. Después de explayarse Corcuera en datos antes que en valoraciones, se advertiría por cualificados miembros del CC –entre otros, de nuevo, Justo Fernández, Antonio Puerta o Matilde Fernández– que no se podía pactar a cualquier precio, pero sobre todo se tenía que resaltar las contrapartidas y hacerlas visibles para evitar malos entendidos internos, y no dañar la imagen de la organización. Incluso Manuel Garnacho pediría una Comisión de Trabajo específica al respecto o directamente Benjamín Castro –UGT-Madrid– plantearía que tal y como estaban las cosas, un futurible acuerdo tan sólo favorecería al Gobierno. No faltaban, pues, las desconfianzas internas –centradas cada vez más en Corcuera– pero sobre todo las visiones negativas de volver a transitar por tortuosos senderos sin tener claro los objetivos y los contenidos. Por su parte, Corcuera no aclararía ninguna de las siguientes preguntas.

El mismo Secretario de Acción Sindical, en un sobrevenido tono crítico, no tendría problema en afirmar que no se “tenían garantías optimistas” en relación con las conversaciones con el Gobierno. Y tampoco tendría problema en afirmar falsamente que no se “han mantenido reuniones con la CEOE”. Pero sobre todo, se negaría rotundamente a la propuesta de crear una Comisión de Trabajo que pudiera supervisar el papel de los negociadores, sin mayores explicaciones ni justificaciones. De hecho, y ante la insistencia del propio Garnacho se llegaría a votar la creación de una Comisión de Trabajo: “La votación refleja el siguiente resultado: a favor de la propuesta 8 votos y por tanteo se rechaza al haber una mayoría en contra y numerosas abstenciones”. Corcuera, no sólo había evitado ser reprobado por la falta de presentación de un informe, sino que no había visto cortocircuitada su autonomía, saliendo, por tanto, con “manos libres” al no haberse concretado las posiciones centrales de la UGT de cara al AES. Una decisión que en pocos meses se considerara un tremendo error, y que evidenciaría, en suma, que las sospechas en torno al *factor Corcuera* por Garnacho, entre otros, estaban bien fundamentadas⁹³.

Pero sobre todo aquel mes de junio –como hemos adelantado– estaría marcado por el III Congreso Confederal de CCOO. Celebrado en Madrid entre el 21 al 24 de junio, su desarrollo, sus debates, sus enfrentamientos devendrán en claves, tanto a nivel de la estrategia seguida en adelante por el mismo sindicato como ante las negociaciones del AES. Todo ello con otro muy importante matiz ante las resoluciones, documentos aprobados y la nueva composición de equilibrios resultantes en la nueva dirección entrante: tal Congreso Confederal

⁹³ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Organización, “Acta de la reunión del II Comité Confederal Ordinario celebrado en Madrid los días 29 y 30 de junio de 1984”, sig. 02607-002.

arroja no poca pistas de las *posibles* causas de que CCOO finalmente no convocara una huelga general.

El sindicato de mayoría comunista desde su nacimiento siempre se había mostrado –a la par que sentido orgulloso– de ser y constituir una fuerza sindical-política plenamente democrática, basada en el asamblearismo, de abajo a arriba y de arriba abajo. Si hasta aquel momento, desde la convocatoria de la Asamblea de Barcelona en junio de 1976 pasando por el I Congreso Confederal (1978) y por el II Congreso (1981), aquellos procesos organizativos se habían superado sin grandes problemas ni cuestionamientos de la línea política seguida; en cambio, en el III Congreso se desatarían todo un conjunto de problemas de muy diversa índole. Así pues, por vez primera se cuestionaría –aunque no de forma firme– la posible continuidad de Marcelino Camacho. Y aquello sí constituía una gran novedad en términos políticos. Por otro lado, en dicho Congreso se trasladarían los enfrentamientos entre las diferentes familias del PCE al seno de CCOO –oficialistas, carrillistas y prosoviéticos– en una tendencia suicida que no sólo había dejado al Partido Comunista con un puñado de diputados, sino también sin base social y militante⁹⁴. Sin embargo, el debate de fondo –más allá de candidaturas, de roces personales y políticos que enseguida contaminarían buena parte de su desarrollo congresual y de los que se haría eco la prensa⁹⁵– sería el debate sobre la estrategia a seguir. A saber, se cuestionaría y se debatiría la permanente campaña de movilizaciones contra el Gobierno Socialista frente a otras posiciones más *posibilistas* o si se prefiere más *negociadoras*.

En las largas como valiosas *memorias* de Camacho dedicaría un largo como sincero apartado al desarrollo de cómo vivió aquel traumático Congreso, en donde se le quedaría marcado el enfrentamiento con su compañero, primero, de Perkins, y más tarde, de la Cárcel de Carabanchel, Julián Ariza⁹⁶. Una lucha por el poder que dejaría no pocas huellas en la posterior conformación de los diferentes órganos de gobierno, pero sobre todo en el día a día a partir del 27 de junio de 1984. Más allá de nombres y personalismos –insistimos– lo realmente trascendente, en términos históricos, es que allí se debatiría una posible *modulación* –no cabría hablar *de cambio*, en ningún caso– de la estrategia seguida.

Exactamente en torno a la ponencia titulada “Los Acuerdos generales. Propuesta de Acción Sindical” surgirían los más enconados debates. Partiendo de la base de que cualquier pacto social no era viable mientras se mantuviera la misma política liberal por parte de los ejecutivos socialistas, en cualquier caso se dejaría la puerta abierta –otra cuestión es que lo que interesadamente se dijera o no en la *prensa*⁹⁷– al diálogo e inclusive a llegar acuerdos. De esta forma, y tras no pocas horas de debate se aprobaría el siguiente como aclaratorio texto, que marcaría la actuación de CCOO en los siguientes meses:

«Hay que decir que la política de la Confederación en relación con los Acuerdos Generales, ha de contemplar tres supuestos que CCOO debe considerar como política estrategia y que comporta una mayor definición de los Acuerdos Generales en varias líneas que se completan, pero que son distintas:

⁹⁴ Véanse aquí al respecto lo apuntado en su momento en, GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delincuentes políticos...*, *op.cit.*; id. “Jaime Sartorius: en primera línea en la reconstrucción de la «lógica democrática»” en GÓMEZ ALÉN, José y VEGA, Rubén (coords.), *Materiales para el...*, *op.cit.*.

⁹⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “Ninguna de las tendencias de CCOO aceptará un acuerdo social si no cambia la política económica”, *El País*, 19 de junio de 1984; Noticia, “El Congreso de CCOO se abre con el enfrentamiento entre varias tendencias”, *El País*, 22 de junio de 1984.

⁹⁶ CAMACHO, Marcelino, *Confieso que he...*, *op.cit.*, pp. 406-ss. Véase asimismo: id., “Una gran organización pluralista y unitaria en un país complejo y contradictorio”, *Gaceta Sindical*, nº 40, (1984), pp. 3 y 7-8. Todo ello junto con lo apuntado en el Capítulo 10, *nota 64*.

⁹⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “CCOO aceptará la moderación salarial, siempre que se compense mayores ayudas a los parados y los pensionistas”, *El País*, 25 de junio de 1984.

1. Acuerdos de solidaridad, que signifiquen una salida a la crisis económica progresista para los trabajadores y cambios estructurales. En el supuesto de que consiguiéramos una relación de fuerzas favorables para forzar esta situación, es necesario llegar a acuerdos con las restantes fuerzas, en la línea de la salida negociada a la crisis que venimos defendiendo [...].
2. Acuerdos generales, tipo ANE, que tienen el objetivo de regular las condiciones de todos los trabajadores activos y no activos, así como elementos importantes de la política económica y social. Sólo en el marco de un esfuerzo colectivo de todas las fuerzas sociales y del Gobierno, se puede discutir la moderación del salario, siempre con un esfuerzo compensador y positivo sobre otros colectivos, parados, pensiones, etc., y en la línea de los contenidos antes apuntados [...].
3. Los acuerdos de negociación colectiva, tipo A.I. Este tipo de acuerdo, más que ningún otro tienen que ser positivos en sí mismos, si no hay contrapartidas, y deben contemplar en sus propios términos bandas salariales que permiten defender el poder adquisitivo de los salarios. Lo contrario sería hacer sacrificios gratuitos. Estos acuerdos no deben significar el avalar ninguna política económica negativa para los trabajadores».

Pero es que, además, desde CCOOO se comprometería como en caso de iniciarse uno de los tres procesos anteriores, los siguientes tres puntos de compromisos: “1.º Información y discusión previa sobre la propuesta a llevar a las negociaciones [...]; 2.º Debate y movilización durante las negociaciones [...]. 3.º Consulta y tomas de decisión final. Se articulará una amplia consulta, dirigida a recoger la opinión mayoritaria de los trabajadores de las empresas”. Para concluir afirmando:

«Situarnos en la lógica de que como no puede haber acuerdos no los planteamos, sería colocarnos a la defensiva y renunciar a la necesidad de contribuir a la realización de una política alternativa a la actual política económica y laboral del Gobierno y no traducir en alternativas más articuladas el descontento de los trabajadores»⁹⁸.

También por parte de la *prensa* se dejaría caer como las tesis mantenidas en la ponencia de *acción sindical* se aproximarían a las defendidas por UGT desde su XXXIII Congreso Confederal en junio de 1983. De este modo, se hablaba de una política de “sacrificios no gratuitos”. Traducido en términos políticos, significa la posibilidad de aceptar una moderación salarial en tanto se avanzara en la mejora económica y social de otros sectores sociales. Todo ello en una versión más dura a la par que rígida del *salario social ugetista*. Y aquí, justamente, sí se daría una dura batalla por parte de los oficialistas para no verse arrastrados por los ataques de los sectores más duros. Todo ello para el final quedar planteado tal y como lo presentó *Gaceta Sindical*, a partir de donde se puede observar, de forma clara, no pocos matices con la propia propuesta ugetista.

«En relación con la política salarial, tres puntos importantes se acordaron en el Congreso, además, lógicamente del mantenimiento del poder adquisitivo. En relación con el IPC se planteó la necesidad de modificar los criterios con que actualmente se calcula, ya que procede de una ‘cesta’ de productos elaborada en 1973 ó 74, cuyo desfase es evidente.

En segundo lugar se aprobó la inclusión en la negociación colectiva de puntos que afectan al poder adquisitivo de los salarios, como las cargas fiscales y las de la Seguridad Social, etc.

Finalmente se planteó que el incremento salarial que se pacte en los convenios debe ser fijado teniendo en cuenta la inflación media, esto es, el IPC previsto y el IPC pasado, con lo que se evitará la pérdida del poder adquisitivo de los salarios por subidas bruscas de la inflación»⁹⁹.

No muchas más dudas habría de ahí en adelante. El riesgo y la posibilidad de que la UGT, la CEOE y el Gobierno dieran un *golpe de mano* y llegarán a un acuerdo antes del verano aprovechando la coyuntura, no era descartable¹⁰⁰.

⁹⁸ “Los acuerdos generales. Texto aprobado en el Congreso”, *Gaceta Sindical*, nº 31, (1984), pp. 12-13. Véase también: “Acuerdos y solidaridad, el gran debate del III Congreso de CCOO”, *Gaceta Sindical*, nº 31, (1984), pp. 5-8.

⁹⁹ “Negociación y acción sindical. Comisión II”, *Gaceta Sindical*, nº 31, (1984), pp. 10-11.

A modo de balance del III Congreso Confederal, cabría afirmar como si bien se abrían camino a las tendencias más aperturistas, una vez que se revisan los documentos aprobados, en donde se incluirían buena parte de las enmiendas de los sectores más radicales, tampoco se cerraba ninguna puerta. El dilema, en parte, no era tanto si pactar o no pactar o al menor dialogar, sino el mantenimiento de la campaña de movilizaciones y por tanto seguir constituyendo el principal bloque de posición al Gobierno socialista. ¿CCOO tenía que seguir construyéndose como alternativa política? He aquí el gran dilema.

En términos prácticos, se saldría como se había entrado del Congreso, como se reconocería desde las propias páginas de *Gaceta Sindical*:

«‘Comisiones Obreras ha reafirmado su estrategia de siempre’. Esta podría ser resumen de gran parte de los debates del Congreso. Reafirmar la estrategia de siempre, vale tanto como decir que Comisiones Obreras se ha reafirmado a sí misma. Esta estrategia, formulada en el I Congreso, vino a recoger la práctica y aportaciones de muchos años atrás, cuando las reuniones y asambleas daban lugar a unas ‘Comisiones’ en vanguardia de la lucha por la libertad, contra la dictadura y en primer línea a la hora de conseguir reivindicaciones concretas, de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en cada momento, avanzando desde lo concreto hacia una perspectiva de clase y nacional, como fue la conquista de las libertades democráticas»¹⁰¹.

. La propia realidad de la dinámica negociadora –basada en una negociación a la baja y de carácter sectario– en los siguientes meses, dejaría en *papel mojado* el ligero cambio de ángulo de la estrategia de Comisiones Obreras. Lo anterior es fundamental. ¿Por qué? Nos ayuda a explicar dos cuestiones. Primero, la reducción progresiva de la campaña de movilizaciones por parte de CCOO, no tanto a nivel cuantitativo sino a nivel cualitativo. Y segundo el incremento de la situación de aguante por parte de los negociadores de CCOO.

Por otra parte, a nivel público y mediático las líneas maestras definitivamente aprobadas tendrían un caluroso recibimiento por parte de algunos medios de comunicación. Así, por ejemplo, en un editorial en extremo voluntarista de *El País* se llegaría a señalar:

«Ahora bien, esas tendencias renovadoras y modernizadoras dentro de CCOO no rompen la continuidad con todas las experiencias de la etapa de la transición democrática, sino que toman distancias respecto a la crispación [...] y procedente en gran medida del entorno político [...] iniciada con la llegada al poder del Gobierno Socialista [...] [E]l III Congreso ha votado por la negociación y se ha pronunciado a favor de buscar un acuerdo para lograr la modificación, al menos parcial, del diseño de la política económica del Gobierno»¹⁰².

ABC tras recordar el crecimiento en militantes y la victoria en empresas claves del tejido productivo por parte de CCOO, advertía como “no se puede ignorar las conclusiones que adopte el sindicato comunista”. Dicho esto, pasaba a *felicitarse* a CCOO: “No cabe sorprenderse ante las conclusiones de este III Congreso de CCOO, sino más bien felicitarse por la claridad de sus posiciones”. Tras calificar al sindicato de *revolucionario*, advertía como “[t]oca al Gobierno recoger el guante del desafío y aprovechar los tres meses veraniegos para neutralizar los términos de la ofensiva”. Y después de denunciar las complicidades de algunos sectores del

¹⁰⁰ En una información de *El País* un par de semanas después, se seguía afirmando como «el Gobierno se muestra muy interesado en negociar la concertación social este mismo mes de julio; Comisiones Obreras prefiere retrasarlo, para evitar la desmovilización obrera del verano y disponer de la palanca de presión social». Noticia, “Trabajo, sanidad y Seguridad Social, la crisis pendiente”, *El País*, 8 de julio de 1984.

¹⁰¹ Editorial, “CCOO reafirma su estrategia”, *Gaceta Sindical*, nº 31, (1984), p. 3.

¹⁰² Editorial, “Comisiones Obreras, en busca del diálogo”, *El País*, 26 de junio de 1984. Y concluía aquel editorial: «Aunque CCOO no renuncie a la movilización, elemento siempre presente en los sistemas de las relaciones industriales de los países democráticos, se abren caminos para establecer con el Gobierno de Felipe González, con la CEOE y con UGT los mismos acuerdos que fueron propiciados y defendidos por Santiago Carrillo cuando Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo ocupaban el poder».

PSOE con las propias Comisiones Obreras –en una campaña comunista de tintes casi internacionales– el fin último pasaba por aislarla socialmente¹⁰³.

Más flexibles, y a su modo más *optimistas*, se mostrarían desde la Ejecutiva de UGT. Por más que se desconfiara de la capacidad interna de unidad ante lo que se denominaba como “la total cristalización de las distintas tendencias políticas que se dan cita en dicha Organización”; en su ya citada reunión del 26 de junio se observa –con no pocas cautelas– como la ponencia de Acción Sindical aprobada, significaba una “aproximación con las tesis mantenidas por nuestra Organización en los últimos años”. ¿Sería así? Tocaba, en adelante, “constatar de manera concreta el comportamiento de CCOO”¹⁰⁴.

El largo preámbulo de la apertura de negociaciones del AES continuaría todavía durante la mayor parte del mes de julio. Entre declaraciones, tomas de posición, reuniones –públicas y secretas– se alargaría la primera reunión oficial hasta el 26 de julio, tras casi cinco meses de *idas y venidas*. Pero mientras que se esperaba el *pistoletazo de salida* se asistiría a la última escalada ofensiva del Gobierno. Junto con el endurecimiento de sus posiciones de partida, trataría también de *acelerar* el proceso de negociación por y a través de unas prisas políticas sobrevenidas con las que dejar prácticamente cerrado el futuro AES antes del verano. Una estrategia tantas veces ensayadas, como tantas veces errada. En que esto no fuera así mucho pesará las divisiones ya patentes en su seno, así como las posiciones de fuerza de UGT y CCOO ante tal aparente posición de fuerza.

En ese ritmo entrecortado en el que parecían transcurrir públicamente las pre-negociaciones del AES, en otra exclusiva de *El País*, firmada por Rodolfo Serrano, se conocían las nuevas propuestas negociadoras del Gobierno a principios de julio, cuando se había cerrado en parte el amago de crisis ministerial, se conocía la posición del Comité Federal de UGT y los resultados del III Congreso de CCOO. En el cada vez más tenso y estratégico tablero de ajedrez –tras moverse durante los anteriores meses *las piezas* “tocables” e “intocables”– se conocía que de ninguna manera se tocaría la Ley de Protección al Desempleo negociada en noviembre de 1983. El argumento oficial: la imposibilidad de destinar más fondos a tal partida. Ello a pesar de que todas y cada una de las previsiones efectuadas hasta aquel momento se habían visto desbordadas por los altos niveles de destrucción de empleo, y, por tanto, la normativa rápidamente había quedado sobrepasada por la realidad económica antes que jurídica.

Con la vista puesta a que los “intocables” acuerdos de noviembre de 1983 entre Trabajo y UGT, no se pudieran verse afectados por las negociaciones del AES; el Gobierno a través del Grupo Parlamentario Socialista tanto en el Senado como en la última vuelta en el Congreso, aceleraría la tramitación del citado *pack legislativo* a toda velocidad. El objetivo: que tanto la RET’84 como la Ley de Protección al Desempleo estuvieran en el BOE en septiembre. No sería así. La Ley 31/1984 y la Ley 32/1984 se publicarían en el BOE un 4 de agosto¹⁰⁵.

Lo anterior, en todo caso, no supondría obstáculo alguno para lo que, hasta entonces, se había considerado “no” negociable se pudiera negociar. Nos referimos a la flexibilización laboral, con especial atención a los jóvenes. A lo que se sumaría en este tramo una nueva vuelta –menos dura– a la reivindicación gubernamental de la política de rentas y de moderación

¹⁰³ Editorial, “La claridad de CCOO”, *ABC*, 24 de junio de 1984. Con respecto a las ‘supuestas’ divisiones internas, *ABC* también muy claro cuál era su opinión: «No tiene sentido poner el acento en las luchas internas de las distintas fracciones comunistas en el seno de CCOO. Estas controversias no son más que matizaciones del mismo fin y reflejo de las pugnas externas por copar la dirección y siglas del PCE».

¹⁰⁴ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 37. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 26 de junio de 1984”, sig. 002251-003.

¹⁰⁵ Noticia, “Dictaminada en el Senado la ley de protección al desempleo”, *El País*, 12 de julio de 1984.

salarial, que preveía seguir acometiendo en 1985 con medio punto de pérdida de poder adquisitivo sobre el 7% de inflación prevista. Por lo demás, en el campo de las contrapartidas – descartada la reforma del título II de la LBE– se limitaba al patrimonio sindical y al reforzamiento de los sindicatos en las empresas.

Después del último Comité Confederal, y ante los sucesivos anuncios públicos pero sobre todo teniendo presente los resultados de tantos encuentros bilaterales con la Administración, la UGT no dudaría en hablar de un “panorama pesimista”¹⁰⁶. Por su parte, la CEOE seguiría en su escalada reivindicativa. A sus consabidas reclamaciones se añadía la petición de más de 400.000 millones de pesetas para la inversión privada.

A la espera de que se abrieran las negociaciones oficiales de una vez por todas, las direcciones confederales de UGT y CCOO tratarían de ensayar el enésimo intento de *unidad de acción*. Un intento condenado de antemano al fracaso. El primer obstáculo: la decisión unilateral del Gobierno de prorrogar dos años el mandato de los delegados sindicales adoptada tiempo atrás, y que todavía pesaba como una losa. Un motivo lo suficientemente importante para que Camacho considerara “prácticamente imposible” alcanzar el acuerdo social de no modificarse tal decisión¹⁰⁷. Por otro lado, se sumaban las diferencias casi históricas que habían venido separando y enfrentando a los dos sindicatos. Los únicos puntos comunes eran el de superar el ANE en su concepción estratégica, que el Gobierno estuviera presente en las negociaciones, y que se fijarían por escrito los acuerdos pero sobre que fueran firmador por González Márquez¹⁰⁸. Ni que decir que tras los sucesos de noviembre del ochenta y tres, el final traumático del *non nato* AI’84 o el enfrentamiento visceral de cara a la celebración del 1º de Mayo, entre otros posibles ejemplos, no aventuraban una pronta recuperación de unas relaciones, en la práctica, rotas más allá de las formalidades oportunas y necesarias.

En este panorama, tanto de cara a la elaboración de una plataforma común entre CCOO y UGT pero también de cara a la futura negociación del AES, no ayudarían las frecuentes *filtraciones* a la prensa de la difícil situación estratégica de la UGT. Cuando la crisis ministerial todavía no se había cerrado totalmente, y el nombre de Corcuera –protagonista de primera fila durante los siguientes meses– figuraba en las quinielas para ser Ministro de Trabajo, se aseguraría desde ámbitos del Gobierno que el “problema de la UGT carece de solución”. Lo que traducido en términos políticos significaba como el “el papel de la central no puede ser otro que *quemarse* en aras de la política gubernamental” en las futuras crisis que, a buen seguro, se desatarían en la reforma de la Sanidad y de la Seguridad Social por la vía de las pensiones. Un nuevo varapalo, en plena *radicalización posibilista* de UGT. Mientras tanto, desde la central socialista, quien había exigido el cambio ministerial en discusión, se quejaría amargamente de su *situación de marginación* y de la falta de información¹⁰⁹. ¿Era verdad aquello o formaba parte de la gran representación de puertas para afuera que venía realizando la familia socialista? Más pronto que tarde, la tradicional *resignación ugetista* volvería a reaparecer.

En este marco descrito, repleto de *oscuras* maniobras, UGT haría su *muy singular* llamamiento al diálogo con CCOO, a través de un intercambio de cartas. Con su siempre espíritu siempre constructivo en la reunión de la CEC de UGT del 3 de julio de 1984¹¹⁰ se

¹⁰⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno excluirá de la concertación social la negociación de nuevas medidas de ayuda a los parados”, *El País*, 2 de julio de 1984; Noticia, J. García Candau, “El Senado amplía la cobertura del desempleo a nuevos colectivos, que reúnen 600.000 personas”, *El País*, 18 de julio de 1984; Noticia, Rodolfo Serrano, “Los parados de mayores de 55 años cobrarán 26.000 pesetas mensuales de seguro de desempleo hasta que se jubilen”, *El País*, 11 de agosto de 1984.

¹⁰⁷ Noticia, “Prolongar el mandato sindical hace casi imposible el acuerdo social, según Camacho”, *El País*, 2 de julio de 1984.

¹⁰⁸ Noticia, “Un intento de superar el ANE”, *El País*, 1 de julio de 1984.

¹⁰⁹ Noticia, “Trabajo, sanidad y Seguridad Social, la crisis pendiente”, *El País*, 8 de julio de 1984.

¹¹⁰ Noticia, “UGT hace un llamamiento a CCOO para dialogar sobre la concertación”, *El País*, 4 de julio de 1984. Dos días después se conocía por la edición de Cataluña del mismo periódico lo siguiente,

decidiría poner en marcha los cauces de diálogo¹¹¹. Siempre propensos a mantener –en un primer momento– las *buenas formas* CCOO aceptaría la invitación en la primera reunión de su Comisión Ejecutiva celebrada el 4 de julio tras su Congreso Confederal. Allí tras una reñida votación para la elección de los nuevos cargos –26 votos a favor, 22 en contra y una abstención– en donde las secretarías más importantes recaerían en manos del sector afín a Camacho; se aceptaría la invitación a dialogar. Otra salida no parecía posible ni aconsejable. Para Comisiones Obreras se abría, pues, una nueva oportunidad para trazar las líneas rojas tantas veces expuestas como argumentadas¹¹².

En concreto, en la citada reunión se presentaría un “trabajo interno” a cargo de Agustín Moreno, en donde se definiría la posición de CCOO con respecto a las futuras negociaciones del AES. Pese a la reciente salida de su III Congreso Confederal las líneas maestras no variarían en lo fundamental, aunque se pondría más empeño en la necesidad de diálogo. Así en el primer punto se señalaba: 1º. “CCOO prioriza la necesidad de acuerdos generales que se inserten en la política de solidaridad que venimos defendiendo”, para señalar a continuación su gran matiz diferenciador con respecto al de la UGT: “Dada la actual política socioeconómica del Gobierno, si éste no varía es imposible un acuerdo global que comprometa al sindicato con la mismo, como tampoco CCOO firmará ningún Pacto Social”. Tildada de *fracaso* la propia política económica socialista, se apostaba por una “política diferente”, basada en cinco grandes puntos: 1. Política de empleo, en donde se reclamaría, entre otras cuestiones, un “incremento de la inversión pública”, la “creación de un Fondo de Solidaridad”, “Planes de fomento del empleo juvenil”, pero ante todo “defensa de la estabilidad en el empleo y freno a la destrucción de empleo con la reforma de la legislatura que lo facilita”; 2. Política de desarrollo Económico; 3. Política solidaria centrada en un esfuerzo nacional; 4. Política más justa socialmente, en donde se incluía un incremento de la cobertura de desempleo; 5, Política más participativa, con petición de reforma de la LOLS.

Por tanto, se estaba por la labor de negociar no sólo con el Gobierno y los interlocutores sociales, sino que además se exigía la participación “de la Banca”. Para lo que se solicitaba la necesaria “voluntad política”, el “necesario tiempo suficiente y con una metodología eficaz”, pero sobre todo “la máxima transparencia e información al país y a los sectores afectados”. No se renunciaría en ningún caso –según la propia Ejecutiva de Comisiones Obreras– a las “presiones necesarias en la líneas de lo acordado en el III Congreso Confederal”, así como se buscarían “posiciones comunes y la unidad de acción entre CCOO y UGT”¹¹³. Una posición político-estratégica que muy pronto chocará con la dura realidad negociadora cada vez menos pública, menos transparente.

En la última acta de la reunión que se tiene de la Ejecutiva de la UGT del 10 de julio hasta principios de septiembre –aunque insistimos, por enésima vez, lo anterior no significa que no hubiera reuniones de la misma– se volvería evidenciar, de forma especialmente clara, la doble estrategia ugetista: intentar llegar “acuerdos por arriba” antes de iniciarse la negociación propiamente dicha, así como atraer a CCOO a un posible acuerdo. Previendo –como así sería aunque sin la formalidad u oficialidad deseada– que se abriera oficialmente las negociaciones del AES en un breve plazo, se acordaría tener una reunión con la “Administración” el jueves 12 con “fin de perfilar las bases del posible Acuerdo para los próximos dos años y establecer conjuntamente la metodología de la propia negociación”, así como impulsar la apertura de las

Noticia, Elena Lorente, “Unidad de acción de CCOO y UGT de Cataluña en temas de empleo y paro juvenil”, *El País*, 14 de julio de 1984.

¹¹¹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 38. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 3 de julio de 1984”, sig. 002251-003.

¹¹² Noticia, Rodolfo Serrano, “CCOO exige que la banca participe en la negociación del acuerdo social”, *El País*, 5 de julio de 1984. Dos días después, Noticia, “Camacho acepta dialogar con UGT sobre la concertación”, *El País*, 7 de julio de 1984.

¹¹³ AHT, CCOO-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal del día 4-VII-1984”, sig. 001-00045. Serie en donde se puede localizar el *documento interno* citado.

negociaciones con el resto de las organizaciones; y por otro lado, “[c]elebrar una reunión de trabajo con CCOO, encaminadas a conocer sus planteamientos respecto de la concertación”, pero ante todo “intentando que dicha Organización gire dentro del marco general que tenemos establecido”¹¹⁴.

También el martes 10 se reuniría el SC de CCOO. Después de que Camacho informara sobre las “cartas intercambiadas” con Redondo, se decidiría mantener la reunión con la central socialista pese a todas las dudas que se mantenían. En realidad, la apuesta de Comisiones Obreras bascularía en *tantear* la “verdadera” voluntad política de UGT, y para ello se le trasladaría realizar “acciones conjuntamente sobre temas puntuales”, y “presentarle el conjunto de medidas [...] tendente a cambiar la política económica del Gobierno”. Eso sí, asegurada la posible respuesta, también se advertiría del riesgo de la “posibilidad de que UGT utilice la unidad de acción con CCOO para presionar al Gobierno”. Más complicado se veía que todavía que la “UGT se independice del Gobierno”. A la par que se “cuidaría” en extremo las posibles palabras y objetivos a manifestar¹¹⁵.

En la práctica, el acercamiento quedaría reducido a dos reuniones. La primera de carácter informal, el día 11 de julio; la segunda de carácter formal el 16 de julio. Si sobre la primera se tuvo conocimiento, la del 16 de julio ya quedaría, en la práctica, sepultada mediáticamente por la intensificación de otros tantos últimos contactos informales de cara a la apertura oficial del AES y que tendrían lugar los días 13 y 14.

De cualquier forma, lo que, al final, trascendería a la prensa era lo esperado: a pesar de los esfuerzos dedicados no había sido posible llegar a una plataforma conjunta¹¹⁶. En lo que se califica como una “charla de café” –de hecho, tendría lugar en una céntrica cafetería de Madrid en la calle Génova– participarían Corcuera y Zufiaur y Ariza y Moreno por UGT y CCOO, respectivamente. Es decir, una reunión al más alto nivel informal en relación a la primera cita señalada. Así por lo que se pudo conocer en las cuestiones generales se estaba en una línea de posible acuerdo. A la hora de los matices, no obstante, las diferencias eran palmarias. Así lo único que se filtraría era de todos conocido: CCOO no entraría a un pacto sin que se modificará la línea económica del Gobierno. Un encuentro –como también informaba Rodolfo Serrano– en donde también se daría a conocer la casi segura implicación de Felipe González en el mismo proceso negociador¹¹⁷.

Volviendo atrás unos días, la reunión del Consejo de Ministros del 12 de julio devendría en fundamental, a menos de un par de días de iniciarse otra nueva ronda de contactos informales con los agentes sociales, convocados ya por la Administración. Por lo que se pudo conocer, en las más diez horas que duraría el mismo Boyer presentaría unas nuevas previsiones, que por el lado más negativo hablaba de la posibilidad de alcanzar los 2,7 millones de parados a finales de 1986. En resumen: más de medio millón de desempleados de los que se habían

¹¹⁴ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 39. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 10 de julio de 1984”, sig. 002251-003.

¹¹⁵ AHT, CCOO, SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 10-VII-1984”, sig. 005-007. En la misma acta se decidiría que Agustín Moreno, por su parte, contactará con Almunia para hablar de la política de empleo juvenil, y Julián Ariza con la CEOE.

¹¹⁶ Noticia, “El Gobierno, decidido a modificar algunos aspectos de su política económica”, *El País*, 17 de julio de 1984. Por lo demás, en todo un clásico ejemplo de anticomunismo, desde *ABC* se advertía a mediados de julio de lo peligroso que pudiera llegar a resultar un acuerdo de unidad de acción entre CCOO y UGT tras las reuniones que habían mantenido. Advirtiéndose finalmente: «Los comunistas ven el pacto social como ocasión para que capitule pacíficamente la libertad económica española. Su estrategia va más allá de la crisis». Editorial, “Pactos para la libertad”, *ABC*, 17 de julio de 1984.

¹¹⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los sindicatos estudian la unificación de posturas para el próximo pacto social”, *El País*, 12 de julio de 1984. Por lo demás, poco más se pudo saber, inclusive, a través de, AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 17-VII-1984”, sig. 005-008.

encontrado los socialistas tras su victoria electoral en octubre de 1982¹¹⁸. En lo que se constituiría en la pre-presentación de la enésima revisión del PEMP, en todo caso, se insistirían en las mismas recetas, empezando por la reducción del déficit público. Aquello motivaría –según las filtraciones a la prensa– más de un enfrentamiento –se hablaría así de “discrepancias internas” que venía anteceditas “desde la formación del Gobierno, [y que] han resurgido con fuerza en los últimos días”– en el seno de un Consejo de Ministros cada vez más enfrentado tanto a nivel interno como a nivel público¹¹⁹. Por lo demás, también se filtraría como se había planteado “la posibilidad de un giro en la política económica actual, en el sentido de poner menos énfasis en la reducción de los salarios y tratar de recuperar actividad y empleo con un cierto relanzamiento”¹²⁰.

Formales pero no oficiales sería la ronda de conversaciones que tendría el Gobierno con la CEOE, la UGT y CCOO durante los días 13 y 14 de julio. En aquella ocasión, como principal interlocutor aparecería el Ministerio de Trabajo *escultado* por parte del equipo económico de Boyer. En un primer momento se buscarían mantener las formas que teóricamente debían de darse en un proceso de estas características.

Pero el intento de mantener cierta formalidad –*estética* o *ética*, según se prefiera– no aguantaría mucho. De esta forma, a los diez días de tales encuentros se filtraría como el mismo Presidente se había entrevistado en secreto –cuando previamente se había negado tal posibilidad– con CEOE y la UGT en los momentos previos al anuncio de convocatoria oficial¹²¹. Por cierto, no serían estas ni las primeras ni las últimas en aquellos días. Así pues el equipo económico se reuniría con la CEOE el 17 de julio y directamente González y Almunia con la CEIM un 19 de julio¹²². Reuniones que volverían a exasperar a las Comisiones Obreras.

¹¹⁸ Unos datos que el propio Boyer negaría en más de una ocasión a lo largo de siguiente semana, Noticia, “Boyer: «La previsión de una pérdida de 450.000 empleos carece de justificación»”, *El País*, 20 de julio de 1984. Una declaración que venía precedida por un contundente comunicado de la dirección de UGT un día antes. «UGT no pide una política económica distinta [...] UGT viene insistiendo en la necesidad de introducir las correcciones necesarias en la aplicación práctica de las grandes magnitudes económicas que permitan cubrir nuestro objetivo principal: la generación de empleo». Sin moverse una línea de su disposición por y para la concertación social, advertía, «que en ningún momento va a compartir ningún nuevo escenario macroeconómico que introduzca la destrucción de 450.000 empleos más a finales de 1986, en lugar de la creación de 800.000 empleos contemplados anteriormente». Noticia, “UGT asegura que no compartirá las previsiones económicas que aumenten el paro en 450.000 personas

¹¹⁹ Hasta el mismo Boyer tendría que salir en aquellos mismos días a *negar* lo evidente. «Siempre se supone que existe una tremenda contradicción entre Alfonso Guerra y yo: no es así la cosa». Guerra, también negaría la posibilidad de una crisis ministerial. Noticia, “Miguel Boyer niega que existan discrepancias entre él y el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra”, *El País*, 14 de julio de 1984. Igualmente se harían públicas unas contundentes críticas a nivel del partido. Por ejemplo, las de Pablo Castellano, entonces líder de la corriente Izquierda Socialista, quien declararía a la agencia EFE unos días antes, «la crisis que nos preocupa de verdad es la crisis del partido». Criticando duramente la política «liberal [y que está] arrastrando a ella a las áreas socio-laboral y, lo que es más grave, cívico-constitucional». Noticia, “Pablo Castellano critica el predominio de las tesis de Boyer en la política del Gobierno”, *El País*, 8 de julio de 1984.

¹²⁰ Noticia, Carlos Gómez, “Un cuadro macroeconómico elaborado por Economía prevé un crecimiento del paro de 450.000 personas en la legislatura”, *El País*, 14 de julio de 1984.

¹²¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Felipe González convoca a sindicatos y patronal después de dos reuniones con CEOE y UGT”, *El País*, 25 de julio de 1984.

¹²² En todo un sintomático gesto, el 17 de julio cuando no habían transcurrido ni una semana de la reunión de Trabajo con la CEOE, la patronal se volvía a reunir con José Borrel y Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Por lo que se filtró a la prensa el Gobierno no estaba dispuesto a modificar las líneas maestras de su política. Hasta la patronal representada por Juan Jiménez Aguilar y José Luis Cerón saldrían de aquella reunión sin grandes novedades y con la impresión de que lo importante se había cerrado previamente. Noticia, Rodolfo Serrano, “Boyer afirma que ni la UGT pide al Gobierno otra política económica”, *El País*, 18 de julio de 1984; y, también, Noticia, Carlos Gómez, “Felipe González,

Pero de vuelta a las reuniones *formales pero no oficiales*, el viernes 13 le tocaría el turno a la CEOE y UGT. De lo que sucedió se conoció, por ejemplo, que UGT exigía, de entrada, para firmar el acuerdo social una cifra redonda en número de contrataciones –lo que no puede ni debe confundirse con empleos creados tal y como criticaría en adelante las Comisiones Obreras¹²³–. Una *baza* que jugaría hasta el último momento del proceso negociador. Igualmente significativa sería la coincidencia global entre el sindicato socialista y la patronal de que el acuerdo debería girar en torno al empleo y la inversión. Por su parte, Almunia hablaría de una repentina existencia de un “margen de maniobra suficiente para el acuerdo” en relación a la política económica del Gobierno¹²⁴. Al día siguiente, el Ministro de Trabajo, bien escoltado por José Borrell y Miguel Ángel Fernández Ordóñez –estando así pues representados un miembro de Trabajo, otro de la Vicepresidencia del Gobierno y un representante de Economía, en un momento de tensiones no negadas en el seno del Gobierno– se reuniría con CCOO¹²⁵. Allí la sintonía sería más bien escasa. “Miguel Boyer, y su política, son incompatibles con la concertación social”, sentenciaría Camacho, convencido además de las prisas por cerrar el posible acuerdo antes del verano. A lo sumo con Comisiones Obreras se llegaría a un parcial entendimiento en torno a la metodología y no de forma total¹²⁶. Así pues, en formato *formal o no formal* muy poco se avanzaría en aquellos días. Lo único seguro es que el Gobierno se comprometería a participar en persona y por escrito.

En el siempre mar incesantes de filtraciones interesadas –en otro acto de voluntarismo estéril y de tono propagandístico– por parte del Ejecutivo se afirmaría como lo más duro en relación a la “moderación salarial” se había realizado¹²⁷. Un anuncio que tras tantas veces anunciado, había perdido su credibilidad. Por la parte sindical de UGT, Corcuera mostraría su disponibilidad a firmar siempre y acuerdo no se quisiera llegar a un “acuerdo maximalista o un acuerdo sindical”, al referirse al planteamiento de CCOO de modificar la política económica del Gobierno¹²⁸. De todos los movimientos anteriores, de inmediato informaría Almunia a

preocupado por la falta de un clima de confianza en el país, según Segurado”, *El País*, 21 de julio de 1984.

¹²³ No pasarían 48 horas cuando Corcuera declararía: «Es necesario [...] la generación de contratos de trabajo a través del aumento del presupuesto del Instituto Nacional de Empleo (INEM) para que éste concierte con las comunidades autónomas planes de empleo público». Noticia, “UGT asegura que no compartirá las previsiones económicas que aumenten el paro en 450.000 personas”, *El País*, 19 de julio de 1984.

¹²⁴ Noticia, “La CEOE quiere conocer los criterios económicos del Gobierno antes de iniciar las negociaciones para el acuerdo social”, *El País*, 14 de julio de 1984; Noticia, “UGT propone medidas para crear 200.000 empleos”, *ABC*, 14 de julio de 1984.

¹²⁵ Hasta *El País* se haría eco de las causas de la presencia de tanto representante de Economía: «Finalmente, en la mesa de negociaciones, la Administración está representada por un representante de Economía y por un representante de la vicepresidencia del Gobierno, junto al Ministro de Trabajo, cuyas posiciones en algunos puntos no son coincidentes». Noticia, “Las dificultades de un pacto social para el resto de legislatura”, *El País*, 17 de julio de 1984.

¹²⁶ Noticia, “«Boyer, incompatible con la concertación», según Camacho”, *El País*, 15 de julio de 1984.

¹²⁷ Noticia, “Las dificultades de un pacto social para el resto de legislatura”, *El País*, 17 de julio de 1984. En aquella noticia-reportaje sin firma se afirmaba también: «Las nuevas conversaciones para lograr un pacto social están siendo propiciadas por el Gobierno, en un momento en que sindicatos y patronal habían relegado ya esta posibilidad ante la dureza de la política económica, y cuando su aplicación ha hecho resurgir con fuerza las diferencias internas del Gabinete».

¹²⁸ Noticia, Rodolfo Serrano y Carlos Gómez, “El Gobierno está dispuesto a superar en el pacto social los compromisos de UCD en el Acuerdo Nacional de Empleo”, *El País*, 17 de julio de 1984.

González, de cara a ver cómo se enfocaba de una vez por todas una pre-negociación interminable sin antes haberse abierto oficialmente¹²⁹.

Pero de lo que no informaría la prensa sería que desde, al menos, el 23 de julio la UGT tenía ya una copia por parte de Trabajo de los “Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, en donde se presentaba, en suma, un primer borrador del futuro desarrollo normativo de los artículos 11, 15 y 17.3 de la Ley 32/1984. ¿Obraba en poder de CCOO los mismos? Se desconoce, de forma fehacientemente, aunque es muy probable que no ante las declaraciones que, con posterioridad, realizara Almunia semanas después –de forma falsa– afirmando que tenía muy avanzado “un anteproyecto de real decreto”. Téngase presente que la vía por la que se ha accedido al citado documento es a través de una carta de la Secretaria de Acción Institucional, firmada por José María Zufiaur un 23 de julio, y dirigida a las Federaciones Estatales de Industrial¹³⁰.

Ahora bien, también el propio Zufiaur había tenido problema alguno en dejar constatado por escrito –aunque sin incluir ningún tipo de documentación– en el informe presentado al II Comité Confederal ordinario de UGT celebrado a finales de junio lo siguiente: como se estaba negociando con Trabajo “la modificación de algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, entre los que hablaba de los contratos en prácticas y para la formación, contrato por nueva actividad y el contrato de relevado. E indicando textualmente: “Decreto que reemplace al 1445/1982 sobre contratos temporales (donde deben introducirse las reformas del Estatuto), contrato a tiempo parcial y medidas de fomento del empleo para jóvenes y mayores”, entre otros¹³¹. Así pues, inclusive la desde finales de junio desde la UGT se tenía antes de finalizar junio una información enormemente valiosa.

Fuera como fuese desde Trabajo se vendría a plantear una nueva ofensiva, que desbordaría las pretensiones y presupuestos ugetistas ante las propuestas allí contenidas. No obstante, y como se planteó en su momento de cara al examen de los artículos 11, 15 y 17.3 pactados en los acuerdos de noviembre del ochenta y tres, el análisis de las nuevas propuestas de Trabajo en relación al desarrollo legislativo de la Ley 32/1984, se presentarán de forma conjunta en el apartado “12.4. El «gran salto adelante»”, de cara a proporcionar una panorámica global y comparativa de las diferentes modificaciones que se producirían en el citado documento hasta su publicación en el BOE¹³².

Del día 25 de julio no pasaba la apertura de las negociaciones del AES, según aseguraba Almunia en Radio Nacional de España el sábado día 21¹³³. No sería el 25 sino el 26, pero ciertamente aquello resultaba un dato bastante menor tras todos los retrasos, aplazamientos ya citados. “Son duros e inflexibles en la negociación –comenzaba así la crónica laboral del domingo 22 de Rodolfo Serrano– en la negociación, aunque mantenga un trato casi constante en los últimos años, se tuteen y se llamen por el nombre de pila, e incluso se pregunten al encontrarse por las anginas de sus *chicos*”. No se refería el cronista laboral a ningún tipo de

¹²⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Boyer afirma que ni la UGT piden al Gobierno otra política económica”, *El País*, 18 de julio de 1984.

¹³⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Acción Institucional, “Carta de José María Zufiaur – Secretario de Acción Institucional– a las Federaciones Estatales Industria”, sig. AI-14-02, en donde se adjunta: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1984.

¹³¹ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Acción Institucional, “Informe de Gestión que presenta la Secretaria de Acción Institucional al II Comité Confederal Ordinario”, Madrid, 29 y 30 de junio de 1984, sig. 2606-004, pp. 3-4.

¹³² Véase el apartado, “12.4. El «gran salto adelante». El desarrollo legislativo de la RET’84: examen de las bases político-institucionales y de los mecanismos jurídicos de la formación histórica de la «cultura empresarial de la precariedad»”.

¹³³ Noticia, “Antes del miércoles, ronda decisiva para la concertación social”, *El País*, 21 de julio de 1984.

película de acción o de suspense. Resultaba bastante trivial el asunto. Hablaba de los hombres que negociarían el AES, a través de un perfil físico, psicológico y político¹³⁴. A lo que se le acompañaría *ad hoc* de una especie de lista del “equipo de fútbol” de cara a la negociación: Joaquín Almunia, desde el Gobierno, José María Cuevas, Juan Jiménez Aguilar y Ángel Panadero por la CEOE y la CEPYME, Antonio Gutiérrez, Julián Ariza y Agustín Moreno por CCOO y José María Zufiaur, José Luis Corcuera y Antón Saracíbar de UGT, conformarían el equipo titular de la mesa negociadora del futuro AES. Jugadores titulares a los que se acompañaban en función de competentes suplentes todo un conjunto de asesores, técnicos y demás personal¹³⁵.

Considerada la gran noticia por parte del diario progresista independiente, también editorializaba sobre la muy cerca apertura de negociaciones. En otro arranque de optimismo empezaba señalando como no se podía caer en “conclusiones derrotistas” de entrada. “Desde la perspectiva de las necesidades generales, hay motivos suficientes para desear que ese concierto se produzca y para confiar en que los agentes sociales y el poder ejecutivo estarán a la altura de sus responsabilidades”. En una nota de opinión en donde en algunas de sus partes más bien parece un comunicado del equipo económico de Boyer, se recordaba el *mal* causado por la conflictividad que “ha perjudicado a la economía española en su conjunto y ha lesionado los intereses de los trabajadores que apoyaron con huelgas fracasadas sus reivindicaciones”. “Sin contención salarial [...] –continuaba aquella nota de opinión– la lucha contra la destrucción de puestos de trabajo está condenada a la derrota”, advertía frente a otro posible *suicidio económico*. Pero todavía tenía más recomendaciones que ofrecer: “La flexibilización del marco de relaciones laborales, a fin de alentar la contratación de los jóvenes, es otro de los caminos a seguir [...]. El desarrollo reglamentario de ese articulado [de la reforma del Estatuto de los Trabajadores] puede ser una de las materias de los acuerdos en curso, además de los planes de fomento directo del empleo”¹³⁶.

En este escenario, las tesis de Comisiones Obreras no podían descartarse: cerrar un pacto durante finales de julio y principios de agosto en pleno periodo estival, para así no tener tiempo de reacción para convocar movilizaciones en tal caso. El objetivo propuesto por su SC pasaba por “posponer cualquier negociación al mes de septiembre”. Todo ello tras su reunión del 24 de julio¹³⁷. Igualmente, si bien, las posiciones de partida así como las diferencias estaban meridianamente claras; por otro lado, no se podía obviar la situación de debilidad interna de todos y cada uno de los protagonistas, a excepción, y parcialmente en todo caso, de la CEOE. Divergencias internas que se acentuarían de forma grave, en no pocos casos, a lo largo del AES y especialmente tras su conclusión a la hora del balance final.

Quien más se jugaba, en realidad, era de nuevo la UGT que no pasaba su mejor momento. Cada vez aparecían dos líneas estratégicas diferenciadas en la siempre monolítica familia socialista. El *desgaste negociador* al escaso año y medio de la llegada de los socialistas al poder, era notable. Hasta en *El País* se hablaba de cómo el “bloque monolítico que hasta ahora ha sido la central socialista comienza a resquebrajarse entre los partidos de exigir del

¹³⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los hombres del pacto”, *El País*, 22 de julio de 1984.

¹³⁵ Noticia, “Los protagonistas de la negociación social”, *El País*, 22 de julio de 1984.

¹³⁶ Editorial, “Un acuerdo para crear empleo”, *El País*, 22 de julio de 1984. Por su parte el editorial de *ABC* al respecto adquiría una *tonalidad* filosófica liberal. Tras destacar el escaso convencimiento del Gobierno al respecto de la utilidad real de un posible acuerdo social, pasaba a sentar cátedra: «La experiencia acumulada sobre la institucionalización de pactos sociales es claramente negativa. La recomendación de los expertos occidentales apunta la sustitución de pactos sociales [...] por la acción de las fuerzas sociales a través de los mercados». Y continuaba: «“[t]odo pacto social sustituye al mercado con preocupantes consecuencias». Editorial, “El precio de la concertación y la experiencia europea”, *ABC*, 23 de julio de 1984.

¹³⁷ AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 24-VII-1984”, sig. 005-009. De hecho, se acordaría lo siguiente: «[M]ostrar nuestra intención de no discutir durante el mes de agosto».

Gobierno un cambio profundo de sus objetivos y los que tratan de justificar las medidas del Gobierno”. Una división que se acrecentaría hasta desembocar en una ruptura harto importante en la cúpula de la central ugetista, a partir del mes de noviembre de aquel mismo año.

Por otro lado, y una vez subsumido el PSOE a su habitual posición secundaria, la división en el seno del Consejo de Ministros conllevaría en relación a las negociaciones del AES dos importantes consecuencias. Cada vez más cuestionadas las tesis del Equipo Económico de seguir el rumbo adoptado costara lo que costara a nivel social y sin concesiones; las voces críticas –lideradas por Alfonso Guerra– estimaban que cuanto menos había que “dulcificar las formas y contenidos” aunque no se cuestionara en el fondo la dirección de la política económica. A menos de seis meses para la celebración del XXX Congreso socialista, con unas cifras de desempleo cada vez más alarmantes, tras un incendiario primer trimestre en huelgas... Boyer y su equipo volverían a un plano secundario del espectro negociador. “Su carácter, distante y autoritario hacia los representantes sindicales, podía haber sido la razón, según algunas fuentes, de que haya sido designado Joaquín Almunia como representante del Ejecutivo en las negociaciones con los representantes de la patronal y de las centrales”, concluía una larga crónica de Rodolfo Serrano¹³⁸. Pero una cosa es que renunciará de *motu proprio* a estar en la primera línea de la negociación, y otra muy distinta que renunciará a influir en lo que se pudiera acordar y más firmar. Así se iniciaría desde el equipo económico una acelerada revisión del PEMP, a través de todo un conjunto de previsiones económicas que darían mucho que hablar, tanto por las cifras en sí mismas como sus continuas contradicciones y rectificaciones.

De este modo, y el mismo día en que se iniciaba “oficialmente” la primera reunión plenaria del AES, se daban a conocer las nuevas previsiones macroeconómicas veraniegas tras el desastroso pronóstico anterior. Sin mayor explicación de una semana para otra la situación había mejorado considerablemente. En aquella ocasión se hablaba de un crecimiento de entre el 3% al 3,5%, con una creación cuantificaba de entre 60.000 y 100.000 puestos de trabajo en 1985 y de entre 100.000 a 150.000 entre 1986 y 1987 –es decir, un total máximo de 250.000– aunque también se apuntaba que “este país [no saldría] de la crisis [...] en el año 1986 [sino] en 1989 o 1990”. Al mismo tiempo, se introducía una muy ligera crítica a lo que más tarde se conocería como el *absentismo inversor*, al destacar como prácticamente una vez saneadas la mayor parte de las empresas, y a pesar de la radical reducción de la inflación y la brutal moderación salarial, los empresarios apenas invertían. La receta: más moderación salarial en busca de las inversiones¹³⁹.

Junto con aquel *alegre* cambio de previsiones macroeconómicas, tampoco ayudaría mucho a mantener las mínimas formas que se conociera por la prensa el 25 de julio como el mismo Felipe González había mantenido dos “reuniones previas” –mantenidas en el “más estricto secreto” se decía literalmente– con UGT y CEOE, mientras que con Comisiones Obreras ni siquiera todavía se la había enviado la invitación formal¹⁴⁰. Reuniones a la que antes ya hemos hecho referencia.

De esta forma, a la reunión pública del 13 de julio, se añadiría la del viernes 20 y la del lunes 23 con UGT y CEOE respectivamente. En lo que se calificaba como *reuniones en la sombra* –nueva modalidad tras las negociaciones *formales* pero no *oficiales*– llegarían a ser

¹³⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “Felipe González se reunirá esta semana con patronal y sindicatos para iniciar las negociaciones del futuro acuerdo”, *El País*, 23 de julio de 1984.

¹³⁹ Noticia, Carlos Gómez, “El Gobierno prevé un crecimiento medio de la economía española entre el 3% y el 3,5% para el trienio 1985-1987”, *ABC*, 26 de julio de 1984.

¹⁴⁰ Al día siguiente Camacho declararía: «No creo que el Gobierno necesite reunirse mucho con UGT [...]. En realidad, casi se pueden poner de acuerdo por teléfono [...]. Tampoco son necesarias muchas reuniones con la patronal, dado que el Gobierno, está haciendo ya la política económica de la COE, cosa que no decimos nosotros, sino que lo admite el propio Boyer». Noticia, “Felipe González recibe hoy a patronal y sindicatos para intentar el pacto social”, *El País*, 26 de julio de 1984.

negadas por los mismos “servicios informativos de la Moncloa”. Todo un aviso de lo que sucedería tan sólo un mes después en donde se llevaría a cabo una *legalización de facto* de este tipo de negociaciones. Destacar, asimismo, que de lo que trascendió de aquellas reuniones, tan sólo se sabría que la CEOE haría llegar un documento de 13 folios con un conjunto de peticiones que iban desde la flexibilización del mercado de trabajo –con especial incidencia en el sector juvenil– a la petición de reducción radical del gasto público.

El mismo jueves día 26 –el gran día de escenificación de la apertura oficial del AES– Julián Ariza publicaba en *El País* un contundente artículo que dejaba bien claras las posiciones de partida de las Comisiones Obreras. Posiciones a tener muy cuenta, ya no sólo porque CCOO se hubiera convertido en la principal bloque opositor a las medidas económicas del Gobierno o por su previa marginación inclusive antes de iniciarse la negociación propiamente dicha; sino porque en aquellas circunstancias representaba el principal obstáculo tanto para el alcance de acuerdos como para los objetivos del Ejecutivo de cerrar el *molesto* asunto de la concertación en unos pocos días. Pero también, y he aquí una razón de peso, por su predisposición inicial de no moverse de la mesa de negociación plenaria hasta el mismo cierre de las negociaciones.

El entonces dirigente comunista, quien más tarde acuñaría al expresión la *Operación del AES* para describir el verdadero interés del Gobierno en la instrumentalización descarada de todas y cada una de las fases del proceso de negociación, empezaba destacando en dicho artículo el enorme interés del Gobierno en “vencer la resistencia que viene ofreciendo los trabajadores y otros sectores populares a su política económica”. Recordaba como la ausencia de un AI’84 no había perjudicado a CCOO y dejaba más claro todavía como la “correlación de fuerzas existente ha permitido obstaculizar la puesta en práctica de una serie de aspectos antisociales de la actual política reestructuración”. Con todo, el riesgo de que el AES sirviera para una mayor precarización del mercado de trabajo por la vía de la flexibilización del ordenamiento jurídico estaba muy presente. Hasta tal punto se esperaba una radicalización en dicho sentido que se había aplazado la reforma de la Seguridad Social, de cara a no desatar una nueva oleada de conflictividad. Se estaba, a juicio de Ariza, ante una “operación política derivada y a la contra de las luchas contra los trabajadores”. “El gobierno no persigue tanto un acuerdo sobre política económica y social como una complicidad de las otras partes en el reajuste a la baja de su programa”, continuaba afirmando. Una operación que se extendía de cara a garantizar tanto la paz social como cierta tranquilidad interna en relación al propio congreso de los socialistas en diciembre de 1984. Pero ante todo, aquella maniobra buscaba –y no se equivocó como demostrarían los hechos– lo siguiente:

«Con semejante acuerdo se buscaría también trasladar a CCOO la crisis de la familia socialista. Ello es así porque, por un lado, se sabe que el mandato congresual de nuestro sindicato no podría cumplirse al negarse las otras partes a tratar seriamente los puntos básicos de CCOO para la concertación. Pero, por otro lado, se piensa que puede haber sectores de CCOO que estarían dispuestos a aceptar el pacto como mal menor. Aspiran a que nos enzarcemos a fondo»¹⁴¹.

12.2. Los tres escenarios de la negociación del AES (julio-octubre de 1984)

Todas y cada una de las grandes tensiones que se venían acumulando estallarían entre julio a octubre de 1984 al calor de la negociación del AES. Se volverían a abrir heridas no cicatrizadas, a la par que se practicaría, sin concesiones, el arte de la política desde una perspectiva maquiavélica, en donde el fin justificaría los métodos y los medios empleados. En las siguientes líneas se continuará agudizando la mirada microscópica, pues tan sólo desde este mismo ángulo se pueden percibir y describir todo un conjunto de movimientos no perceptibles a primera vista, que están detrás de las componendas que posibilitarían que un 9 de octubre se firme el AES.

¹⁴¹ ARIZA, Julián, “Un pacto antisocial”, *El País*, 26 de julio de 1984.

Un proceso negociador que tendrá un considerable desgaste para todos los protagonistas, a excepción de la CEOE que saldrá notablemente reforzada de todo este proceso. Una negociación en la que se abandonara todo *signo amateur* para convertirse en un juego de movimientos entre consumados especialistas negociadores, en donde todo signo, movimiento o factor se ha de estimar. No es para menos, teniendo presente, además, que en estos meses se asiste a un rebrote de la conflictividad obrera cada vez más radicalizada.

Igualmente, la relevancia que irá adquiriendo las negociaciones del futuro AES, devendrá en básico a corto plazo para frenar las divisiones internas del Gobierno y en buena medida dentro de la familia socialista; a medio plazo, para garantizar la paz social durante el siguiente bienio y seguir avanzando en la política de los frentes posibles en un progresivo desplazamiento de lo económico a lo político con el tema del referéndum de la OTAN de por medio; y a largo plazo, la firma del Acuerdo Económico y Social tendrá la virtud –desde la perspectiva gubernamental y empresarial– de garantizar, a su manera, el ajuste de los mecanismos de oferta y demanda en el mercado de trabajo al coste de la precarización laboral.

De esta forma, el AES no sólo deviene en un *pacto social* en términos políticos, económicos y sociales, sino que cobraría una enorme importancia a nivel sindical. O mejor dicho, en el ámbito del movimiento obrero. Tras un recatado como temporal entusiasmo por parte de la UGT después de su firma, el recuerdo vivo de por donde transcurrieron las negociaciones así como todas las concesiones que llevarían consigo –incluidas nuevas agresiones en materia de derechos laborales y sociales en los siguientes meses– pero sobre todo el incumplimiento del AES en su parte social y laboral –tal y como había sucedido desde los Pactos de la Moncloa o en el ANE– terminarían propiciando entre UGT y CCOO, a la par que asestando un duro golpe a las buenas relaciones de la familia socialista¹⁴². En resumen, nos encontramos, en términos históricos, con un acuerdo social clave en múltiples dimensiones para toda la época socialista, y que llegaría a transformar la propia concepción de la *concertación social*.

En esta ocasión, se ha dividido el presente epígrafe en cuatro grandes apartados, a lo que sumará un quinto dedicado al análisis de la estructura y contenido del mismo AES. Apartados sustentados en la marcha cronológica de las propias negociaciones. A partir de las mismas fuentes ya empleadas anteriormente, las crónicas laborales tanto de Gustavo Matías –hasta mediados de septiembre– como de Rodolfo Serrano –a partir de la anterior fecha citada– continúan guardando una trascendencia fundamental para seguir todo el proceso. De la importancia que otorgaría a la prensa a todo este proceso, puede dar buena cuenta como en menos de tres meses *El País* dedicará más de una docena de portadas y exclusivas periodísticas a su seguimiento. Una fuente de información que todavía cobra más relevancia, teniendo presente que hasta principios de septiembre se carece, tanto por parte de UGT como de CCOO, de documentación primaria al respecto.

Una negociación que tendrá tres escenarios principales. El *oficial*, a través de las reuniones plenarias; el *técnico*, en donde en cada uno de los actores irían cerrando cuestiones concretas en paralelo al anterior escenario; y finalmente, el *secreto*. Este último *escenario* sería rebautizado para la citada ocasión como las “reuniones bilaterales” y se encontraría dominado por un “pacto de silencio” entre sus participantes. Como veremos –y ya en parte hemos apuntado– aquí se procedería a una curiosa legalización del secretismo como base para avanzar en la negociación, con la marginación y expulsión formal de las Comisiones Obreras, que no con su autoexclusión como de forma se insistente se ha remarcado en los grandes relatos –tanto liberales como de una parte sindical concreta– sobre este mismo tiempo¹⁴³.

¹⁴² De nuevo, nos remitimos al apartado, al apartado, “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el *único camino posible* de la economía política socialista?”.

¹⁴³ Desde la derecha a la izquierda no se ha dejado de insistir en esta idea/imagen-fuerza, centrada en la siguiente tesis: CCOO se automarginó, se autoexcluyó con otro tipo de ramificaciones menores,

12.2.1. Guardando las apariencias: tanteos preliminares (26 de julio-26 agosto)

Nueva portada de *ABC* para “don” Felipe: “González, a favor de «empresas sanas y rentables»”. “Lo progresista es procurar que las empresas sean sanas y rentables como fórmula para crear empleo”, señalaría el Presidente del Gobierno en la primera reunión “oficial” en busca del acuerdo social un jueves 26 de julio¹⁴⁴. Una mesa presidida –como un símbolo a tener en cuenta– por González y por Cuevas en cada extremo. Asimismo *El País* también se haría eco en su portada de cómo el mismo Presidente había mostrado todo su empeño en reducir el coste del dinero¹⁴⁵. Todo un mensaje destinado a la clase empresarial antes que a los sindicatos y que bien encajaba con la lógica del discurso liberal.

“Nadie podrá decir en esta ocasión –expresaría también en el mismo encuentro– que el Gobierno no quiere el acuerdo”, en clara referencia a lo que había sucedido con el AI’84. Escoltado por Almunia y Boyer –quien prácticamente tan sólo aparecería en aquella ocasión, enviando en adelante a sus fieles aliados– este último dejaría bien claro que a pesar de existir un *margen de maniobra*, la dirección de la política económica no se iba a tocar. Por lo demás, lo que allí se pudo escuchar por el resto de los participantes era bien conocido. Así por ejemplo, UGT se mostraría, de entrada –y pese a que ya obraba en su poder desde al menos el 23 de julio, el documento base de Trabajo para el desarrollo legislativo de la RET’84– predispuesta a aceptar una nueva moderación salarial a cambio de otras contraprestaciones sociales. Por su parte, Marcelino Camacho quien ya sabía cómo se solía jugar este tipo de partidas saldría de la reunión con la sensación de que “el resto de los interlocutores [tenían] una cierta connivencia sobre los temas tratados”. Una *sospecha* bien fundamentada como se ha dejado sobradamente constatado¹⁴⁶.

Lo cierto es que la *negociación oficial* había iniciado sus primeros pasos viciada de antemano. No sólo por las filtraciones de reuniones y/o encuentros secretos, sino por todo el cumulo de indicios que, por un lado, indicaban la alta sintonía entre Gobierno y patronal, y, por

dependiendo del personaje en cuestión que emitiera el correspondiente *juicio*. Entre otros muchos ejemplos posibles, Justo Domínguez, quien llegaría a ser Secretario General de UGT-Cataluña, afirmaría: «Antes de conocerse las magnitudes presupuestas para 1985, CCOO había decidido no firmar el posible acuerdo. La razón de fondo era que no querían corresponsabilizarse de la política económica del gobierno y consideraba que podrían cambiar mediante actos de presión externa. Es indudable que la marcha de CCOO de la mesa negociadora debilitó las posiciones sindicales». DOMÍNGUEZ, Justo, “Diez años de relaciones laborales industriales en España” en ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos..., op.cit.*, p. 93. Es de destacar un hecho del todo significativo: inclusive desde la CEOE siempre se sería más compresivo con la posición de CCOO que desde la propia UGT: «Las posiciones radicales del sindicato comunista son interpretadas por los restantes negociadores como una clara muestra de su intención de no suscribir el Acuerdo e inclusive de retrasar en lo posible las negociaciones. En realidad la estrategia de CCOO, con mayor presencia en las fábricas es coherente. La firma de un Acuerdo supondría, en buena parte, una renuncia a la movilización en el curso de la Negociación de los distintos colectivo colectivos». IGLESÍAS, Rodrigo, “La concertación social desde la perspectivas de las organizaciones empresariales” en *ibídem*, p. 162. De hecho, se trata de una tesis tan extendida que inclusive Manuel Tuñón de Lara la daría por válida: «La negociación fue cada vez más [...] difícil. La patronal pedía con fuerza posibilidades de despido y reforma a fondo de la seguridad social. De entrada, Marcelino Camacho, en nombre de CCOO, se retiró, basándose en que el sindicato no quiera avalar una política económica de rigor y ajuste». TUÑÓN de LARA, Manuel, “El movimiento obrero de 1981 a 1991” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del..., op.cit.*, p. 498. De hecho, uno de los pocos historiadores que no ‘ha caído en esta trampa’ ha sido, SOTO CARMONA, Álvaro, “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)” en RUIZ, David (dir.), *Historia de Comisiones..., op.cit.*, p. 474. Véase también la *nota* 328.

¹⁴⁴ Portada, “González, a favor de «empresas sanas y rentables»”, *ABC*, 27 de julio de 1984.

¹⁴⁵ Portada, “Felipe González dice que hay que rebajar el coste del dinero para crear empleo”, *El País*, 27 de julio de 1984.

¹⁴⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “Felipe González reconoce la existencia de conversaciones para reducir el precio del dinero de cara a conseguir mayor inversión”, *El País*, 27 de julio de 1984.

otro lado, del Gobierno con la UGT. De hecho, el viernes 27 se aprobaría en el Congreso la reforma del mercado de trabajo negociada entre Trabajo y la central ugetista. Además se había accedido a la petición de esta última de prorrogar los mandatos sindicales dos años más. Pese a que era altamente probable que Comisiones Obreras no firmara el acuerdo, tampoco se podía obviar sus tesis congresuales de junio de 1984. Tocaba, pues, *guardar las apariencias*, al menos, durante un tiempo prudencial, más cuando el Gobierno había indicado que estaba por la labor de negociar y llegar a acuerdos.

En este último sentido, tal era la relevancia otorgada por González al futuro AES, que citaría personalmente a Marcelino Camacho para el sábado el viernes día 27. Una reunión de la que poco o nada se filtraría a la prensa¹⁴⁷. Hasta *El País* guardaría también las apariencias de forma relativa. En un editorial el mismo viernes anterior se hacía eco de esta situación, aunque justificando la marginación de CCOO: “Por parte del Gobierno existe la sensación [...] de que el acuerdo con CCOO, si no imposible, se presenta muy difícil. Esta sensación sería el motivo de que se haya marginado a CCOO”. “Aun reconociendo que la ausencia de este sindicato puede significar un duro revés a la eficacia del pacto, no se descarta –e incluso se desea– la posibilidad de un acuerdo a tres”, señalaba a continuación. Tras criticar la inoportunidad de la citada entrevista –por las formas que no por el trasfondo– se afirma como pese al “radicalismo últimamente un tanto suavizado” de CCOO, encabezada por Camacho, los motivos para su *marginación* seguían presentes¹⁴⁸.

También en aquel viernes 27 tendría la segunda sesión plenaria del AES en la sede del Ministerio de Trabajo. De aquella reunión como novedades se citaría por primera vez el nombre del futuro acuerdo social: Acuerdo Económico y Social –nombre que ya había sonado como premonitorio durante la cena en que se acordaría el “pacto del Parrillón”¹⁴⁹– además de acordarse la metodología y un posible calendario de reuniones. Pero ante todo quedaría claro, nuevamente, las *prisas* del Ejecutivo en cerrar el acuerdo. Se hablaba entonces de la primera semana de agosto de cara a elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 1984.

Bautizado el acuerdo y con unos plazos más o menos concretos, CCOO insistiría que en aquel corto periodo de tiempo, o bien todo está “pactado entre las otras partes” o no era viable el mismo. Las tesis mantenidas por las propias Comisiones en su reunión del Secretariado Confederal del día 24 parecían confirmarse plenamente. Inclusive, la CEOE y UGT veían técnicamente imposible el acuerdo sin conocer ni siquiera el citado “margen de maniobra” con datos y detalles¹⁵⁰. Lo que, a su vez, evidenciaba como la estrategia de la Ejecutiva de UGT de llegar a la apertura de las negociaciones formales con un “acuerdo de mínimos” y “por arriba”, había vuelto a fallar.

¿Cuáles eran los *márgenes* en los que se movía el Gobierno? Pronto se sabría. En concreto en la tercera reunión plenaria del 30 de julio. Una cita en donde se entregarían los primeros documentos al respecto¹⁵¹. Las previsiones allí aportadas no produjeron grandes sorpresas. Almunia, acompañado de José Borrell, Segismundo Crespo y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insistían en las mismas recetas de todos conocidos: 6,5% de subida salarial

¹⁴⁷ En la crónica laboral del sábado 28 en *El País* apenas se diría algo más que confirmar la existencia de la reunión. Noticia, Rodolfo Serrano, “El Consejo de Ministros estudiará el martes las condiciones exigidas por sindicatos y patronal”, *El País*, 28 de julio de 1984.

¹⁴⁸ Editorial, “Suavizar las diferencias con Comisiones Obreras”, *El País*, 27 de julio de 1984. Aquel mismo día *ABC* también llevaba a su editorial el inicio de las negociaciones en todo un canto favorable a las posiciones de la CEOE. Editorial, “Concertación y empleo”, *ABC*, 27 de julio de 1984.

¹⁴⁹ Nos remitimos aquí a lo apuntado en el apartado “6.2.1. Los tres pilares de la *lógica de la modernización socialista*”.

¹⁵⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Consejo de Ministros estudiará el martes las condiciones exigidas por sindicatos y patronal”, *El País*, 28 de julio de 1984.

¹⁵¹ Éste y otros tantos documentos no han podido ser localizados hasta el momento. Véase, lo apuntado en su momento en el apartado “2.3. *Papeles para una historia del tiempo vivido*”.

previando una inflación de un punto más, con una estimación del 3% de crecimiento del PIB y con una política continuista en la reducción del déficit público. A lo que se sumaría unos 34.000 millones de cara al presupuesto de la Seguridad Social y 22.000 millones más al desempleo. A ninguno de los implicados el *baile de cifras* le convencería. CCOO no dejaba de ver en aquellos datos la más estricta continuación de todo lo anterior. Pero, al menos, el Ejecutivo se granjearía durante el siguiente mes un “cauto silencio” o “silencio crítico” –según el día y la hora– por parte de la UGT¹⁵².

En un ambiente político y social sin grandes tensiones por el momento, en la cuarta reunión plenaria celebrada el 2 de agosto, el Gobierno haría entrega de la segunda parte de la documentación¹⁵³. En todo un nuevo ejercicio de voluntarismo económico –el tercero en un mes– de repente se había pasado de estimar la destrucción de 450.000 empleos, a unos días más tarde la creación de 250.000 empleos e inclusive no se descartaba en el llamado “escenario optimista” la creación de 700.000 empleos en los siguientes dos años. Además se volvía a concretar puntillosamente cifras resultantes: 315.000 durante 1985 a un ritmo del 3% del PIB, y 378.000 a un 3,5% del PIB. No había que ser un *entendido* para observar como los citados datos se asemejaban a cierta promesa electoral, se procedía a la simple operación de sumar ambas cantidades. Estas mismas cifras ocuparían durante días las portadas, comentarios y editoriales de los principales medios de comunicación. Una atención que, en parte, desviaría el resto de contenidos de la mesa negociadora.

Con una rapidez y capacidad *digna de mención*, la patronal en menos de 24 horas de la entrega de la documentación, no sólo había sido capaz de leer en profundidad las propuestas del Gobierno, examinarlas, debatirlas, sino que había redactado un informe de 77 folios. Y todavía había tenido el tiempo suficiente de preparar una rueda de prensa para dar a conocer sus valoraciones. “Alternativa empresarial al presupuesto socialista”, era el titular de la portada de *ABC* el día 4 de agosto¹⁵⁴. Tocaba marcar distancias, endurecer gradualmente el discurso y entre las reivindicaciones de mínimos *colar* alguna reivindicación histórica y/o de máximos. Calificadas por el mismo Cuevas de muy pocas serias las cuatro reuniones plenarias formales habidas hasta entonces, y de mostrarse pesimista, introducía en la agenda negociadora el tema la reducción de los tipos de interés, con lo que ponía en cuestión la muy ortodoxa política monetaria al respecto del Gobierno¹⁵⁵.

¹⁵² Noticia, Rodolfo Serrano, “La facultad de inversión y de financiación privada son las mayores dificultades para el acuerdo social”, *El País*, 1 de agosto de 1984.

¹⁵³ Resulta extraordinariamente complicado localizar en la prensa grandes apoyos y adhesiones al proceso negociador. De hecho, la mayoría vendrían por el lado empresarial y las políticas liberales o muy liberales. Éste sería el caso de Fuentes Quintana quien en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se mostraba plenamente partidario de la política económica –con la flexibilización del mercado de trabajo y la moderación salarial en primera línea– y del futuro AES: «La negociación abierta por el Gobierno con centrales sindicales y organizaciones empresariales es el reconocimiento explícito de que el pacto es fundamental para salir de la crisis». Noticia, “Fuentes Quintana considera imprescindible el pacto social”, *El País*, 4 de agosto de 1984.

¹⁵⁴ Portada, “Alternativa empresarial al presupuestos socialista”, *El País*, 4 de agosto de 1984. En un encendido editorial pro-empresarial de *ABC* se concluía con toda rememoración memorialística: «Aceptar lo propuesto por el Gobierno sería como repetir el error que supuso aceptar los Pactos de la Moncloa. Pactos en cuyas consecuencias finales todavía estamos». Editorial, “Alternativa empresarial”, *ABC*, 4 de agosto de 1984.

¹⁵⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “El presidente de la CEOE amenaza con no suscribir el acuerdo si no se modifica la política financiera”, *El País*, 4 de agosto de 1984; Noticia, José Antonio Vega, “CEOE no firma el pacto social en las condiciones actuales”, *El País*, 4 de agosto de 1984. Dos semanas más tarde volvía a publicar otro nuevo informe al respecto de los tipos de interés, de cara a presionar en la reanudación de las negociaciones del AES. Noticia, “Las instituciones financieras mantienen unos tipos de interés que superan en ocho puntos la tasa de inflación”, *El País*, 18 de agosto de 1984.

Sin salernos, por el momento, del manido asunto de las cifras: en todo un gesto de *coordinación* pero sobre de *fiabilidad*, Miguel Boyer presente en la cuarta sesión plenaria, primero, negaría la veracidad de las cifras presentadas –en otro gesto, por cierto, bastante habitual–. Avisando, a continuación, de las que las mimas que se había transmitido –incluso se hablaba también de que en ese periodo tan sólo se crearán 53.000 empleos– no eran ciertas, a pesar de llevar el membrete de Economía. Rectificaría sin pestañear y afirmaría como “uno aprende de sus propios errores”, para a continuación tachar todas y cada una de las previsiones de mera especulación. Sin duda estamos, ante otro de esos “milagros” de la *dialéctica socialista* en su vertiente gubernamental con un *toque* de “realismo mágico” que se agudizará en los siguientes días. Una *dialéctica* siempre más rica en matices y contrasentidos que la ofrecida a nivel de Partido. De hecho, en una vuelta nueva de tuerca, el propio Boyer sí dejaría caer que esas orientaciones podían ser válidas en tanto en cuanto se moderaran los salarios, se flexibilizará el mercado...

Por cierto, a partir de ahí, los representantes y Gobierno decidirían dar un parón significativo a las citas negociaciones hasta el día 27 de agosto, una vez establecidas las materias objeto de negociación. Daba inicio una muy relativa calma negociadora, aunque el principal temor de CCOO se hubiera disipado. Ahora bien, ¿seguirían en la *sombra* las habituales reuniones bilaterales y/o unilaterales?

Portada de *El País* del sábado 4 de agosto: “El Gobierno califica de «simple operación aritmética» su previsión de crear 700.000 empleos”. Vuelta a empezar. Curiosamente un gran conocedor de cómo se elaboró el programa electoral, Joaquín Almunia, declaraba a *El País* que las cifras dadas por su propio Gobierno constituían un “simple ejercicio aritmético”, aunque “únicamente si se logra el acuerdo podría hacerse una previsión exacta de los puestos de trabajo que se generarían”¹⁵⁶. Con una enorme susceptibilidad de por medio, sin disimulo alguno señalaría también que las previsiones provenían de Economía y no de Trabajo. Pero la ya sufrida lógica discursiva y política no tenía ahí a su final, pues también aparecía un claro culpable: si se había errado, rectificado, negado o vuelto a validar las cifras en escasas horas, aquello era responsabilidad, casi en exclusiva, de CCOO por su extrema pesadez en solicitar datos concretos de cara a la negociación¹⁵⁷.

Todavía más, pues en tal *ambiente* y en un contexto de casi total “descrédito estadístico gubernamental” desde Trabajo se seguiría, a su manera, “tranquilizando” a las centrales

¹⁵⁶ Días después en un editorial de *El País* se podía leer: «No se puede crear el vacío en cuanto a proyecciones de empleo y utilizar, por ejemplo, como si fuesen *tablas de la ley*, los índices de precios al consumo para pedir moderación salarial». Editorial, “Las dificultades de un acuerdo”, *El País*, 13 de agosto de 1984.

¹⁵⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “Joaquín Almunia reduce a «simple ejercicio aritmético» el anuncio de crear 700.000 empleos en los dos próximos años”, *El País*, 4 de agosto de 1984. Una crónica en donde también se incluían las siguientes declaraciones del Ministro de Trabajo: «el Gobierno todo lo que ha puesto sobre la mesa lo ha hecho de forma abierta [...]. Y nos hemos resistido a dar datos precisamente para que no existiera la sensación de que se negociaba sobre conceptos inamovibles». El asunto de las *previsiones* del Equipo Económico y compañía llegaría a tal punto que el propio Ramón Tamames pediría dimisiones. En el primero de los dos artículos publicados en *El País* a mediados del mes de agosto indicaba, en primer lugar: «Y el Libro Verde proyectado, de un plan económico para 1983-1986, quedó en mero ‘programa económico a medio plazo’, con la excusa de que no cabe planificar sin el Consejo [Económico y Social] constitucionalmente previsto. Pero lo más grave es que el programa cuatrienal [...], con las indecisiones propias de quienes consideran que planificar en vez de reducir la incertidumbre y de ayudar a construir el futuro es una acción más bien perniciosa, se vio relegado, por el transcurso de un año perdido, a programa trienal, y poco a poco fue cayendo en el olvido, para finalmente quedar todo a merced de las rutinarias previsiones presupuestaria de año a año». Concluyendo: «Semejantes palabras [las declaraciones de Almunia citadas líneas más arriba] habrían sido suficientes en otras latitudes políticas para dimitir del cargo por ostensible irresponsabilidad técnica y política y por la más elemental fatal de respeto a las partes en presencia». TAMAMES, Ramón, “Cuestiones previas a la concertación de septiembre (1)”, *El País*, 15 de agosto de 1984.

sindicales en general y a los trabajadores en particular. El lunes 6 de agosto, tras la *resaca estadística* del fin de semana, se anunciaba desde el propio Ministerio de Trabajo que se tenía muy avanzado un “anteproyecto de real decreto” sobre los contratos en prácticas y formación. Un documento que como hemos tenido la ocasión de verificar documentalmente, ya obraba en poder de la Ejecutiva de UGT, y de sus Federaciones de Industria, desde el 23 de julio. Lo que parece probable es que Comisiones Obreras no disponía de tan valiosa información.

Pero de vuelta al *anteproyecto* sobre el que se venía dando noticias en forma de cuentagotas desde mayo, se volvía a sacar a relucir –sin concretar– cuando más convenientemente se estimaba. Así cuando no habían transcurrido ni 72 horas de la publicación en el BOE de la Ley 32/1984 se anunciaba la flexibilización radical con todo tipo de beneficios fiscales de los contratos destinados, principalmente, a los jóvenes. El mensaje, sin duda alguna, tenía un claro trasfondo progresista: “El Gobierno está dispuesto a flexibilizar al máximo la contratación temporal, sin con ello consigue hacer frenar los índices de desempleo y conseguir, a la vez, convencer a la patronal de las bondades del pacto [AES]”. De hecho, una fuente del Ministerio de Trabajo señalaría que a pesar de que aquella normativa sirviera a despedir a trabajadores fijos por jóvenes, tal cambio “sería siempre positivo”¹⁵⁸. También se constaría una doble hipótesis de primer orden que hemos venido barajando: primero, para el Ejecutivo el contenido del *pack legislativo* de noviembre de 1983 siempre sería considerado y valorado como insuficiente; aprobada y publicada la Ley 32/1984, se rompía el pacto entre Trabajo y UGT sobre no *tocar* el mismo.

Mientras que el paro en julio había marcado un nuevo record –20,1% con 2.644.900 personas sin trabajo– desde la Oficina Económica del Gobierno no dejaba de jugar a prestidigitador de cifras y por su parte desde Trabajo se interpretaban aquellos datos a su manera, es decir, con el consabido *realismo mágico socialista*: no se renunciaría en la citada ocasión a continuar explicando tales datos por las frecuentes manipulaciones, ocultaciones o directamente falsificaciones sobre las cifras de la EPA. En un medio tan poco sospechoso como *El País* durante los días 15 y 16 de agosto se hacían eco de la extraña situación que se había dado con los datos del primer semestre del año de la EPA. 5.100 personas tan sólo aparecían como nuevos parados. Una cifra todavía más sospechosa por coincidir con el arranque de la negociación del AES y todavía más –tras casi un mes– por no haberse hecho público hasta entonces. También resultaba extraño, según el propio periodista, la caída de 77.400 personas que buscaban trabajo. Una singular caída demográfica en plena entrada de la última cohorte de la generación del *baby boom*. Haciéndose eco de la propia “campana de autodescrédito” de Almunia –quien como recordaba el periodista en la oposición había creado la expresión “Tasa de Paro Insoportable”– de los propios socialistas contra sí mismos, indicaba como los “asépticos tecnócratas que gobiernan hoy la economía española cuentan los resultados de su política monetarista (tres previsiones van bien y una va mal) como si estuvieran en un partido de fútbol, es decir, tres a uno”¹⁵⁹.

Y es que los datos macroeconómicos no evidenciaban, ciertamente, una política socialista ni siquiera progresista y menos socialdemócrata. En el *informe anual* del Banco Bilbao correspondiente a 1983 –una referencia central inclusive por encima de las muy

¹⁵⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “Las empresas podrán contratar a licenciados universitarios y jóvenes sin empleo sin pagar cuota a la Seguridad Social”, *El País*, 7 de agosto de 1984.

¹⁵⁹ Noticia, J. A. Martínez Soler, “384.500 empleos destruidos durante los 18 primeros meses de gobierno socialista. La tasa de paro insoportable (TPI) (1)”, *El País*, 15 de julio de 1984. Al día siguiente en la segunda parte de aquel amplio reportaje, tras reseñar el afán liberalizador del Gobierno concluía: «Tan desastrosos resultados contra el objetivo prioritario del PSOE y del Gobierno socialista han contribuido a resucitar entre los economistas monetaristas y socialdemócratas el debate universal sobre si la política económica es, puede ser o debe ser ideológicamente neutral». Noticia, Martínez Soler, J.A., “El número de españoles en edad de trabajar que no tienen empleo ha crecido en 410.100 desde diciembre de 1982. La tasa de paro insoportable (TPI) (2)”, *El País*, 16 de agosto de 1984.

precarias estadísticas oficiales por aquel tiempo¹⁶⁰ – quedaban bien claros los efectos del primer año de Gobierno socialista, como prontamente sacaría a relucir *Unión*¹⁶¹. En menos de doce meses se había acentuado, de forma grave, la tendencia decreciente de las rentas del trabajo en favor de las del capital. Un proceso que venía produciéndose con especial virulencia desde los Pactos de la Moncloa, y que tan sólo para 1982 y 1983 había pasado del 43,7% al 43% en relación a la participación de los salario en el PIB. Asimismo destacaba el incremento del excedente de explotación, pero sobre todo como los beneficios privados habían crecido en solo 12 meses más de un 18%¹⁶². Datos confirmados por el propio Ministerio de Economía y Hacienda, quienes estimaban el crecimiento de los excedentes empresariales en un 15% para 1984. De hecho, se afirmaba como los mismos “supera[ban] los planes iniciales del Gobierno”, en un *informe* al que había tenido acceso la prensa pero no algunos participantes de la negociación del AES, en tanto la CEOE criticaría abiertamente aquellos datos. Tal era la proyección de crecimiento de los citados excedentes empresarial –1,2 puntos de crecimiento para 1984 de cara al PIB– que los mismos estaban convirtiéndose en la principal causa de la inflación por encima de los costes salariales¹⁶³. Ahora bien, aquellas cifras llevaban necesariamente aparejadas otra lectura: la no reinversión de los abultados excedentes empresariales, lo que ponía en clara contradicción las proclamas de Boyer y compañía sobre las *virtudes* de la mejora del excedente de explotación¹⁶⁴.

En el muy relativo *parón veraniego* negociador no faltarían ni las declaraciones, ni los globos sondas, ni los anuncios inesperados así como los editoriales de turno. “Por añadidura, en esta ocasión se podía decir que la normalidad que supone un tiempo de ocio [...] debería haber tenido una cierta excepción, por la urgencia de llegar a un acuerdo que, indudablemente [...] va a alterar sustantivamente los proyectos presupuestarios del próximo ejercicio”, era la primera reflexión del tercer editorial de *El País* acerca del AES. Una toma de posiciones que no sería muy frecuente en esta ocasión, y que tan sólo se repetiría ya muy avanzado el acuerdo.

Continuaba aquel mismo editorial, afirmando como “[d]esde el estricto interés sindical, las materias que el Gobierno propone en la negociación no tienen un gran atractivo”. Una situación de partida harto complicada, pues la política económica no sólo no era intocable sino que seguía siendo necesaria mayor flexibilidad y mayor moderación salarial. “Sacrificios difícilmente compensables con mayores contrapartidas sociales”, más teniendo en cuenta la situación presupuestaria. De modo que tan sólo cabía esperar a que las “organizaciones obreras trasciendan sus propios intereses a los del conjunto de los trabajadores. Así el AES adquiriría la tonalidad de un gran pacto de Estado –“el pacto social resulta casi imprescindible” – y en donde

¹⁶⁰ Véase lo apuntado en la *nota 151*.

¹⁶¹ “Los trabajadores perdemos parte del pastel”, *Unión*, n° 57, (1984), pp. 14-15.

¹⁶² Noticia, Joaquín Estefanía, “En 1983 decreció la participación del trabajo en el producto interior bruto y se recuperaron las rentas del capital”, *El País*, 12 de agosto de 1984.

¹⁶³ Noticia, Gustavo Matías, “El excedente empresarial crecerá este año más del 15% y elevará 1,2 puntos su parte en el producto interior bruto”, *El País*, 13 de agosto de 1984.

¹⁶⁴ Así lo expresaba el profesor Joan Trullén en un curso de verano de 1984 en la Universitat Catalana de Estiu: «[L]a evidencia disponible señala que no sólo no aumento la inversión al reducirse la participación de los salarios, sino que parece ocurrir todo lo contrario: las épocas de mayor crecimiento de la inversión han coincidido con las de mayor expansión de la participación de los salarios en el PIB». Concluyendo: «La reducción del crédito disponible del sector privado será compensada por el incremento del excedente de explotación de las empresas que tratarán de autofinanciarse a costa de las rentas salariales. Es decir, toda la política oficial en este punto consiste en impulsar el aumento del excedente para que crezca la inversión». Noticia, Andreu Misse, “La reducción de los incrementos salariales desde 1977 no ha significado mayor inversión productiva, según el profesor Trullén”, *El País*, 17 de agosto de 1984. Véase también, Noticia, Víctor Gijón, “La política de rentas no produce efectos positivos sobre el empleo”, *El País*, 21 de agosto de 1984.

el peso del Presidente debería de ser decisivo¹⁶⁵. La *llamada* al “sacrificio sindical” volvía a aparecer.

Hasta la reapertura “oficiosa” de las negociaciones del AES a finales de agosto se irían cruzando todo un conjunto de declaraciones por parte del Gobierno e inclusive por parte de UGT, quien había adoptado una *estrategia silenciosa* en lo mediático y de apoyo crítico. Cabe deducir a tenor de lo que sucedería, en breve, que aquel permanente cruce de propuestas –en un claro tono *ofensivo*– parecía responder a una estrategia pactada o cuando menos a una muy íntima correlación de intereses y de posicionamientos. En este tipo de casos, las casualidades no suelen darse en exceso.

Desde Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, como no podía ser de otra manera, vendría el primer *globo sonda*. En 13 de agosto, lunes para ser más exactos, Segismundo Crespo, hombre de confianza de Almunia y con un protagonismo destacado a la hora de las negociaciones, afirmaría con una inusitada “alegría” por los procedimientos democráticos, que en el AES se incluiría también el tema de la reconversión industrial y las posibles *contrapartidas* para los sindicatos y los trabajadores. Puesto a ofrecer en el tranquilo plácido verano santanderino, también señalaría como el Gobierno abriría a la cogestión con los agentes sociales el fondo de solidaridad que se pensaba poner en marcha. No terminarían ahí los ofrecimientos, pues asimismo incluía en la agenda negociadora el desarrollo de la reforma del mercado de trabajo que no la revisión de la misma como solicitaba Comisiones Obreras¹⁶⁶. UGT por boca de José Luis Corcuera –quien comenzaría sus desmarcarse cara vez más claramente tanto de la CEC de la UGT como de la comisión negociadora ugetista del AES– a cinco días de reanudarse las negociaciones declararía a la agencia EFE como desde el sindicato no se podrían “condiciones mínimas o máximas”. José María Zufiaur también ponía mucho de su parte cuando también en Santander declaraba que aunque no era deseable no se descartaba que desde UGT se firmara el pacto en solitario, tachando la actitud de Comisiones Obreras de “suicida”¹⁶⁷.

En el mismo curso –*La flexibilización del mercado laboral en España*– en que participaba Zufiaur –acompañado en aquella ocasión de Agustín Moreno y de Diego de Pedroso de la CEOE– intervendría Almunia. Allí reforzaría, una vez más, las tesis de la familia socialista al respecto de como la supuesta ausencia de CCOO en el AES, no impediría lo inevitable como había sucedido con el AMI. Si los mensajes a las Comisiones Obreras parecían dejar poco o ningún resquicio a la duda, otro tanto sucedería con los enviados a la CEOE, ahora por la parte gubernamental. En aquella misma ocasión, se dejaría abierta la posibilidad de seguir incrementando la flexibilidad de la legislación, no aumentar la inversión pública, modificar los tipos de interés y la presión fiscal y continuar por la senda de la moderación salarial... En resumen, una *invitación a la carta* a la CEOE. Lo que no se podía negar, en ningún caso y de ninguna forma, es que el Gobierno si estaba en dicha ocasión por la labor de pactar y alcanzar acuerdos¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Editorial, “Las dificultades de un acuerdo”, *El País*, 13 de agosto de 1984. Un editorial que incluía el tradicional *mensaje* para las Comisiones Obreras: «Algunos dirigentes de CCOO deben olvidar las viejas teorías de las correas de transmisión de los partidos y dejar de trasladar las diferencias que existen dentro del partido comunista al seno del sindicato. Ello implica abandonar las tesis del *no* al pacto social por su misma esencia y entrar a valorar los contenidos concretos; es decir, apoyar la política de solidaridad nacional, que desde hace años defiende teóricamente la central sindical».

¹⁶⁶ Noticia, Gustavo Matías, “La reconversión industrial y sus contrapartidas serán incluidas en el Acuerdo Económico y Social que se negocia”, *El País*, 14 de agosto de 1984.

¹⁶⁷ Noticia, Víctor Gijón, “UGT, dispuesto a suscribir un acuerdo social satisfactorio sin la presencia de CCOO, según José María Zufiaur”, *El País*, 24 de agosto de 1984.

¹⁶⁸ Noticia, Víctor Gijón, “El Gobierno estará abierto a las propuestas de patronal y sindicatos, según Joaquín Almunia”, *El País*, 25 de octubre de 1984.

12.2.2. Conspiraciones, traiciones y «cantos de sirena» del Gobierno (27 de agosto-9 de septiembre)

En las siguientes semanas, y dependiendo el día y el momento desde la prensa lo mismo se hablaría de optimismo, de pesimismo, de cierto optimismo o simplemente se daba casi por imposible el AES. Descarta, marginada y ninguneada de entrada Comisiones Obreras, el Gobierno había prodigado sus *cantos de sirena* para atraer a la patronal hasta introducir, uno por uno, todos sus puntos de debate y negociación. Se informaba, de hecho, que durante los días de parón “no se han registrado reuniones bilaterales ni cambios de actitud”. ¿Sería cierto? Lo anterior lo decía Gustavo Matías quien había llevado el día a día de la información laboral para *El País*, y a quien se le debía una atribuir una muy considerable capacidad de *información subterránea*. Ahora bien, resultaba complicado pensar –o al menos no sospechar– que entre pausa y pausa en los pasillos del Palacio de Magdalena en la UIMP en el desarrollo de los cursos de verano no hablarán los protagonistas al respecto o directamente se llamarán cuando así lo estimarán oportuno. Los antecedentes –más o menos recientes– así lo parecían indicar.

En esta situación de relativo *impasse* Marcelino Camacho realizaría unas declaraciones que cambiarían si no el *rumbo* si la estrategia y la forma de las futuras negociaciones del AES, en lo que a la postre se iba a convertir en una de las operaciones más sucias y burdas de la política española contemporánea. Señalaría en concreto el domingo 26 de agosto, justo antes de la reanudación de las sesiones plenarias, que CCOO no se retirará de la mesa en ningún momento” en tanto “hasta el último minuto vamos a tratar de modificar la política económica”. Una consigna que sería debidamente atendida por los interlocutores apropiados¹⁶⁹.

El País llevaría a su portada del martes 28 de agosto la negociación del AES, tras su quinta reunión, destacando las propuestas del Ejecutivo acerca de no tocar, por el momento, la reforma de las pensiones e incrementar la inversión pública. Un anuncio que llegaba, y no de forma aleatoria y/o casual, después del *menú a la carta* ofrecido por el señor Ministro de Trabajo a la patronal, tras cinco horas de reunión. Por un lado, el Gobierno ponía sobre la mesa 39.100 millones de pesetas más en el apartado de la inversión pública, lo que suponía una elevación de cerca del 8%. Asimismo se daba, en principio, hasta mediados de septiembre para cerrar, al menos, los temas con incidencia presupuestaria¹⁷⁰.

En este marco de relativa tranquilidad, las cosas avanzaban a su aparente ritmo, sin sobresaltos, pero con constantes anuncios desde determinados sectores económicos próximos –o directamente relacionados– con el Gobierno, que veían en dichas cesiones otra oportunidad pérdida de no avanzar, con paso firme y sin titubeos, en el proyecto liberal modernizador¹⁷¹. Por otro lado, el Ejecutivo en su afán de flexibilizar y apostar firmemente por el acuerdo social declararía de forma oficial –como había anunciado unos días antes– que se aplazaría la reforma de las pensiones para 1986. Una oferta –*de ida y de vuelta* como veremos– lo suficientemente sugestiva para desterrar cualquier tentación opositora de la UGT. No era para menos, pues, la central ugetista se había implicado hasta límites no imaginables en su continua flexibilización programática en relación a la reforma del mercado de trabajo desde noviembre de 1983. A buen

¹⁶⁹ Noticia, Gustavo Matías, “Marcelino Camacho anuncia que CCOO no se retirará de la negociación del Acuerdo Económico y Social”, *El País*, 27 de agosto de 1984.

¹⁷⁰ Noticia, Gustavo Matías, “El Gobierno sugiere aplazar a 1986 la rebaja en las nuevas pensiones y elevar la inversión pública en 39.100 millones más”, *El País*, 28 de agosto de 1984.

¹⁷¹ En Santander en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo –como si no existieran otros cursos de verano en todo el Estado– *El País* se hacía eco de la intervención de un antiguo comunista –de los ortodoxos para más señas– rápidamente reconvertido a la causa neoliberal. José Luis Malo indicaría en una conferencia –entre la quinta y la sexta reunión plenaria del AES– que lo avanzando hasta el momento era insuficiente. Con razón –razonaba el economista– los empresarios no invertían debido a los *elevados costes de despido* de los trabajadores fijos. En su opinión, se trataba de una cuestión que tenía que incluirse, sí o sí, en el AES. Por si faltaban dudas terminaría hablando de la necesidad de implantar el despido libre y prácticamente gratuito. Noticia, Salvador Arancibia, “Los elevados costes de despido desaniman la inversión empresarial”, *El País*, 29 de agosto de 1984.

seguro, introducir el tema de las pensiones en la agenda negociadora con la entonces correlación de fuerzas y conociendo la determinación del equipo económico, hubiera llevado a un enfrentamiento de imprevisibles consecuencias dentro de la familia socialista. Y, por el momento, ese conflicto no se está por la labor de dar. Todavía no había llegado la hora.

No era para menos. El tema de las pensiones y siempre bajo la *Espada de Damocles* de llevar a cabo una profunda reforma de la Seguridad Social, guiada contra el fraude y la necesidad de modernizar el sistema contributivo –según los argumentos oficiosos gubernamentales de la época– se había constituido en una constante desde la composición del Gobierno. No habían faltado las declaraciones, las filtraciones los editoriales, ni algún que otro documento elaborado desde Moncloa o desde Economía siempre en una misma orientación, hasta el punto de ir confeccionando el necesario consenso político, social y mediático, para que llegado el momento se pudiera afrontar la citada reforma con garantías de éxito¹⁷².

Dentro de esa dinámica constante, en donde el cuestionamiento de lo público –sin aparentemente más alternativas viables– estaba presente explícita o implícitamente, según el momento, el lugar y el portavoz de turno, se filtraría a la prensa entre la quinta y la sexta reunión plenaria las *previsiones* del Gobierno sobre la futura reforma de la Seguridad Social, cuando se había renunciando, en un principio, a la misma dentro del AES. La imprecisión y/o falta de coordinación volvía a ser la nota dominante. O acaso, ¿aquello formaba parte de una estrategia fabricada *ex novo* para la ocasión? Más allá de las astronómicas cifras que se esperaban ahorrar –66.442 millones durante el primer año y cerca de 200.000 millones el tercer año– se apuntaba como la “novedad más destacada radica en el cálculo de la reducción de gastos por pensiones mantenido en secreto hasta ahora”. Una intención que bien casaba con las propuestas de la CEOE en esta materia –elevación del número año de cotización, incrementar a *niveles europeos* el periodo cotización elegible para determinar la cuantía pensión...– y que, en gran medida, se verían reflejadas en la reforma de las pensiones de 1985¹⁷³. Tampoco ayudaría a despejar incertidumbres entusiásticas declaraciones como las de Miguel Ángel Fernández Ordoñez a favor de los fondos privados de pensiones –“son instituciones que en tiempos de crisis permiten una actitud solidaria entre los asalariados y los parados”– en los momentos previos de la aprobación de la normativa reguladora al respecto¹⁷⁴.

¹⁷² En la creación del necesario consenso político-académico, excepcionales resultarían los artículos en contra de las posiciones gubernamentales y pro-empresariales. Una excepción que confirmaría la regla sería el artículo publicado en *El País* por el economista José Herce San Miguel. En un artículo necesario y plenamente desmitificador de los argumentos liberales acerca de la Seguridad Social, los datos que maneja el autor le llevarían a una primera conclusión y una primera advertencia: «[N]o es la Seguridad Social lo que está en peligro de quiebra, sino que es todo el tejido social». Para añadir: «[R]esulta, cuando menos, insensato aludir, como hacer constantemente los responsables de la economía pública española, a la inminente quiebra de la Seguridad Social sin advertir que los principios de solidaridad intergeneracional han quebrado seguramente hace tiempo». Tras advertir de los riesgos de que con tales planteamientos entonces se puede «retroceder al siglo XX». Y acerva de avanzar hacia un sistema mixto entre lo público y lo privado: «Los gestores *naturales* de los mismos [fondos de pensiones] parecen ser las compañías de seguros, y quizá convenga recordar que este sector acaba de iniciar su reconversión, que será tan silenciosa como la del sector bancario». HERCE SAN MIGUEL, José A., “La quiebra de la Seguridad Social y la Seguridad Social de la quiebra”, *El País*, 7 de septiembre de 1984. También resultaría extraño localizar en la prensa diaria del momento argumentos de peso, que cuestionarían frontalmente las previsiones gubernamentales. Una excepción que confirma la regla: Noticia, Víctor Gijón, “El número de jubilaciones crecerá en los próximos años por debajo de las previsiones del Ministerio de Trabajo”, *El País*, 28 de agosto de 1984. Asimismo, véase lo apuntado en su momento en el apartado “2.3.1.3. Fuentes estadísticas: una aproximación obligadamente crítica”.

¹⁷³ Portada, “Los nuevos pensionistas cobrarán 80.000 pesetas menos al año”, *El País*, 29 de agosto de 1984; Noticia, Gustavo Matías, “Los 460.000 nuevos pensionistas anuales recibirán 80.000 pesetas menos que ahora, según estimaciones del Gobierno”, *El País*, 29 de agosto de 1984.

¹⁷⁴ Noticia, Víctor Gijón, “El Gobierno regulará en breve el funcionamiento de los fondos de pensiones”, *El País*, 31 de agosto de 1984. Por lo demás, nos remitimos a lo apuntado en el Capítulo 8, *nota 312 y nota 314*.

Sin que en *apariencia* nadie se lo solicitara o se lo exigiera, la UGT renunciaría públicamente, antes de la celebración de la sexta reunión plenaria del AES, a su propuesta de que el Gobierno se comprometiera a crear un determinado número de contratos –que no de empleos– tal y como había propuesto anteriormente. *Gratis*, sin contrapartidas en un principio. En cualquier caso, tal anuncio llegaba justo después de que el Gobierno renunciara –temporalmente– a incluir la reforma de la Seguridad Social en el AES. En lo que se calificaba como “un intento de limar asperezas y hacer posible el pacto, así como de marcar distancias con CCOO”, la central socialista se conformaba con un compromiso numérico exclusivamente en el sector público. Las mayores contrapartidas que buscaba en aquel momento del proceso negociador giraban en torno al incremento del gasto público. Por un lado, solicitaba 10.000 millones más en conjunto –de 130.000 a 140.000, es decir del 8% al 12%– a lo que se añadían otros 30.000 millones para generar empleo. Medidas todas ellas que pretendía obtener sin elevar el déficit público y situándose la mayor recaudación a partir de la lucha contra el fraude fiscal. A la par que se remarcaba como UGT no iba a permitir, bajo ninguna circunstancia, que los trabajadores volverían perder el poder adquisitivo global¹⁷⁵.

Pronto la siempre solícita predisposición de UGT encontraría la respuesta esperada por parte de Almunia. ¿Nueva representación del gran teatro de la política? No es descartable. De esta forma el Ministro de Trabajo afirmaría a la salida de la sexta reunión el Ministro de Trabajo, un jueves 30 de agosto de 1984, como “los 5,2 millones de pensionistas actuales tienen garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo”. Representación o coincidencia o mera causalidad de aquellos atropellados tiempos negociadores, lo cierto es que dichas proposiciones se encontraban muy lejos de las tesis mantenidas por CCOO –cuya propuesta pasaba por elevar del 20% al 24% la participación del Gobierno en el fondo de la Seguridad Social– ni de la propia CEOE –partidaria de una radical reforma, vía reducción cotizaciones–. Ante las dudas, se optaría por una *solución salomónica*: abrir una mesa paralela técnica compuesta por expertos para la siguiente semana.

Pero aquellas numeras coincidencias no terminarían ahí. En el campo de la inversión pública, mientras que el Gobierno fijaba un crecimiento del 8% la inversión pública casi doblando su propuesta inicial –fijada en un 4,7%– para la CEOE la misma se quedaba corta –cifrada por la patronal en 13,4%, 64.000 millones más que los ofrecidos por el Ejecutivo– y todavía más lejos de CCOO –quien fijaría la cantidad en un 25% sobre la propuesta inicial–. En cambio, UGT se conformaba con dichos *tanteos* preliminares, al proponer elevar el gasto en un 12% –tan sólo 60.000 millones más–. La central socialista, de hecho, también fijaría en aquella reunión sus propuestas concretas en creación de contratos para el sector público: 25.000 contratados más en la Administración Pública, a lo que había que sumar entre 180.000 y 200.000 con contratos temporales mediante conciertos del INEM con instituciones públicas¹⁷⁶. Otro logro de ingeniería político-laboral a la hora de cuantificar, con tal precisión, las posibilidades objetivas y reales de un posible acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que las previsiones económicas del PEMP variaban de forma extraña en ocasiones.

Más pronto que tarde se conocerían las causas de aquella sintonía y sobre todo la falta de notas discordantes –más allá de la ya habitual descalificación de “irrazonables” en torno a las propuestas de Comisiones Obreras, quien veía como el Gobierno se limitaba a “tomar nota” sin prestar mayor atención, lo que le hacía dudar seriamente sobre la “caballerosidad” de sus acompañantes de mesa– en tanto habían desaparecido las clásicas declaraciones pesimistas. No obstante, por lo que pudiera suceder o porque simplemente no había llegado el momento político oportuno, todavía se guardarían las apariencias formales en aquellas largas reuniones plenarias en las sedes del Ministerio de Trabajo en los Nuevos Ministerios de Madrid, que terminan a media noche o entrada la madrugada.

¹⁷⁵ Noticia, Gustavo Matías, “El sindicato UGT limita al sector público la existencia de que el Gobierno socialista fije el número de empleos a crear”, *El País*, 30 de agosto de 1984.

¹⁷⁶ Noticia, Gustavo Matías, “Los «actuales» pensionistas mantendrán su poder adquisitivo, según el ministro de Trabajo”, *El País*, 31 de agosto de 1984.

En la primera reunión de la Ejecutiva de UGT desde la última en julio, en concreto, un 3 de septiembre, se mantendría una prudente distancia con respecto a la marcha de las negociaciones, a las que todavía se observaba en un estado primario al no haberse concretado, de forma total, las posiciones de cada parte en todos y cada uno de los puntos objetos de negociación. Ni una sola palabra se hablaría de más acerca de ciertas reuniones “no” públicas¹⁷⁷.

La semana del tres al nueve de septiembre de 1984 iba a resultar decisiva, y no, precisamente, por lo que se discutía o no en las mesas oficiales de negociaciones. Las propias noticias económicas con las que se cerraría aquella semana no aventuraban nada positivo. Así días antes de celebrarse la séptima reunión plenaria, el Gobierno, de nuevo, veía desbordadas sus previsiones. Y no era cualquier variación estadística. Nos referimos a los datos de la inflación. Con no poco retraso, los datos de julio que se conocerían el viernes 31 de agosto. Los mismos resultarían demoledores para la Oficina Económica del Gobierno. A pesar de que las reservas de divisas habían mejorado ostensiblemente –800 millones de dólares más– y el déficit público seguía proyección bajista, el crecimiento del 1,5% del IPC tan sólo en el mes de julio elevaba la tasa interanual al 12,7% y en lo que se llevaba de año en 6,17 puntos. Más de cuatro puntos sobre las previsiones constituía un muy mal resultado se mirara por donde se mirara. De “accidente” se calificarían los datos desde el Ministerio de Economía, que esperaba cerrar el año con un 9%, lo que de ser así se convertiría un *notable* para Boyer, quien lejos de auto-críticas se auto-felicitaba por la marcha de la economía¹⁷⁸.

No faltarían las críticas desde las diferentes fuerzas políticas y sindicales, pero sobre todo desde los editoriales económicos de *El País* y *ABC* el día sábado 1 de septiembre. Desde esta último medio se advertía como “la inflación en España no está contenida, sino artificialmente rebajada por fuerte descenso de la demanda en el mercado interior”. Lejos de los datos ofrecidos por instituciones públicas y privadas que indicaban que entre las causas de la inflación se encontraban los propios excedentes empresariales, para *ABC* ante todo la “inflación se genera por el tremendo y continuado déficit público”. Por si faltaban dudas, los salarios aparecían como los principales culpables: “así vemos cómo un millón y medio de trabajadores tienen pactada la revisión automática de sus salarios si en septiembre el índice de precios supera el 6,38 por 100”¹⁷⁹. Por otro lado, desde *El País* no ahoraban en críticas al calificar tales datos como señal de “alarma” pero también como “síntoma” de que las cosas no marchaban bien. Y, en este caso, concreta las *sospechas* se dirigirían contra el “sector alimenticio”. Y dentro de ahí la carne pollo con un incremento del 18,37% aparecía como el principal responsable. Hipótesis que con enorme pericia –y nos pocas dosis de astucia– serían confirmadas por Economía, quien culpabilizaba al *pollo* como el principal responsable de la subida del IPC¹⁸⁰.

El asunto era lo suficientemente grave, aparte de las correspondientes declaraciones de altos cargos de la Administración imbuidos de su habitual *realismo mágico*, para que desde el propio *El País*, se calificara como “imposible” el cumplimiento las previsiones gubernamentales, y se fijaran las más altas “esperanzas” en conseguir el milagro a través de los salarios. Dicho esto, no se dudaba que tales datos podían llegar a hacer naufragar el futuro pacto social. “Todo ello, de agravarse, replanteará la fundamental polémica del momento

¹⁷⁷ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 40. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 3 de septiembre de 1984”, sig. 002251-003.

¹⁷⁸ Noticia, Gustavo Matías, “El Gobierno intentará encajar en su política económica la subida de los precios e impedir que se repita «el accidente»”, *El País*, 1 de septiembre de 1984.

¹⁷⁹ Editorial, “La inflación se dispara”, *ABC*, 1 de septiembre de 1984.

¹⁸⁰ Así lo señalaría el mismo Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la séptima reunión plenaria del AES, quien aventuraba nuevas previsiones para ajustarlas a lo que pudiera ocurrir al final del año. Noticia, Luis F. Fidalgo, “Las finanzas de la Seguridad Social no permiten la jubilación a los 64 años, según Almunia”, *El País*, 4 de septiembre de 1984.

político, que es justamente económica, a saber: la gradación que debe *adornar* la política económica”. Con todo, la receta era la de siempre: continuar con la misma política¹⁸¹.

En este ambiente tan poco propicio para avanzar en un pacto social como el que se venía esbozando, y que hacía de la moderación salarial uno de sus ejes centrales, se celebraría la séptima reunión plenaria el 3 de septiembre. También se conocería –antes de avanzar– como en paralelo a lo que se discutía en la mesa central del AES, desde Trabajo se habían dado las instrucciones oportunas a las oficinas provinciales del INEM para poner en marcha las nuevas formulas de contratación, mientras que los técnicos de los agentes sociales estudiaban el desarrollo reglamentario de la reforma del Estatuto de los Trabajadores una vez que se había hecho llegar la documentación, aunque siga desconociendo exactamente la fecha de entrega de la misma¹⁸².

De esta forma, el lunes 3 –en la citada séptima sesión plenaria– la CEOE deslizaría, por vez primera vez, su propuesta de “despido libre”. Eso sí, bastante camuflada y sin mayores detalles. Todo ello, bajo el fundamentado argumento de que la extinción del contrato no necesitaría de mayores precisiones administrativas que la más estricta voluntad ecuaníme de los empresarios. “Esto sería una legalización del derecho de pernada”, declararía José María Zufiaur trazando así una línea roja infranqueable para UGT. Todo tenía sus límites, por más que desde la central socialista se mostraría en extremo flexible a la hora de que la patronal no tuviera que pasar por caja a la hora de abonar las cuotas a la Seguridad Social de los contratos de práctica y de formación, así como de mayores de 45 años. No terminarían por ahí tampoco las coincidencias –formales y no formales– en tanto estaban de acuerdo la patronal y la central socialista en como la posible jubilación a los 64 años no conllevaría mayor gasto público –ello a pesar de que el mismo Almunia rechazaría tal posibilidad al “no” coste de incumplir otra promesa electoral– así como que las horas extraordinarias no se abonarán en metálico sino en jornadas libres. Tan flexible se mostraría la UGT que la reducción de la jornada laboral a 38 horas se posponía por *motu proprio* para dos años después. Por su parte, CCOO firme en su disposición de no moverse de la mesa de negociación, continuaba mostrando su oposición a los que se iba acordando y que tan lejos quedaba de sus propuestas.

Precisamente desde Comisiones Obreras consciente de su marginación cada vez más grande –aunque desconociera las verdaderas dimensiones de la operación negociadora que, en paralelo, se venía gestando– se llevaría a cabo un último y casi desesperado intento de frenar las pretensiones del patronal y del Gobierno. De este modo, Camacho el miércoles 5 enviaría una carta a su homólogo Redondo, en donde le solicitaba el inicio de una serie de conversaciones entre CCOO y UGT, ante la constatación de cómo se estaba perfilando la “continuidad en la misma política económica, que hace prever similar ineficacia en la lucha contra el paro”. La respuesta del Secretario General de UGT no tardaría en llegar. El jueves 6 de septiembre, le respondería en uno de los mayores ejercicios de cinismo político que se recuerden:

«Estamos abiertos, pues, a las reuniones bilaterales [...] pero consideramos que ellas deben producirse en el marco de las actuales negociaciones, por los compañeros que representan a CCOO y a UGT, y para tratar tanto los temas a que te refieres como todos los demás que interesan a los trabajadores y al conjunto de la sociedad española, en el contexto de un acuerdo que estimamos importante»¹⁸³.

¹⁸¹ Editorial, “Alarma en los precios”, *El País*, 1 de septiembre de 1984. Se apuntaba también allí lo siguiente: «Siempre sobre la base de que la austeridad sigue siendo necesaria, pueden resurgir las opiniones que reclaman una mayor estabilización, y a buen seguro lo harán las de quienes sostienen que un poco más de *alegría*, dentro de un orden, no haría daño a lo esencial del proceso de ajuste, y que no vale la pena morir por medio punto menos de un guarismo».

¹⁸² Noticia, “Contratación temporal”, *El País*, 5 de septiembre de 1984.

¹⁸³ Noticia, “CCOO y UGT, de acuerdo para negociar una actuación sindical conjunta”, *El País*, 7 de septiembre de 1984.

El aparente como monótono ritmo negociador del AES estallaría por los aires el sábado 8 de septiembre de 1984. *El País* llevaba a su portada el siguiente titular: “Gobierno, CEOE y UGT han negociado en secreto el pacto para 1985-1986”. El cúmulo de sospechas se confirmaban, aunque tampoco constituían, en verdad, ninguna gran novedad conociendo los habituales trances que había permitido, a la postre, configurar el “modelo español de concertación social”.

Sin embargo, la citada primicia aparecía en un momento en que las negociaciones oficiales no avanzaban y los datos macroeconómicos no acompañaban las expectativas gubernamentales. A lo que se sumaba las dificultades políticas tanto dentro del Ejecutivo como del PSOE en relación al giro estratégico mantenido en la cuestión de la permanencia en la OTAN¹⁸⁴. Entonces, ¿por qué *El País* llevaba a su primera página una noticia de tal calibre que podía dificultar todavía más el futuro AES? Acaso, ¿se trataba de una estrategia destinada a expulsar definitivamente a CCOO y así acelerar el proceso? Dicho esto, ¿formaba parte de una interesada filtración? O por el contrario, ¿los interlocutores de CEOE, UGT y Gobierno no fueron capaces de guardar el prudente silencio y sigilo para que no saliera publicado? Una hipótesis que resulta difícil de mantener cuando, justamente, hemos venido hablando de la muy extendida profesionalización y profesionalidad de los negociadores. Aunque todavía están por contestar la mayoría de las anteriores preguntas, no se puede descartar que se jugara con la posibilidad de que ninguna pública y mediáticamente, Comisiones Obreras tras conocer dicha filtración decidiera “salir” de la mesa de negociación. Y, a su vez, iniciar una política de movilizaciones y declaraciones radicales, que pudieran ser empleadas en su contra a la hora de la firma del AES.

Una tesis, la de la radicalización de CCOO, de la que se venía hablando largo y tendido en los medios de comunicación y en determinadas instancias. Pero, aún con todo, ¿se podía asumir el riesgo de asistir a otra oleada de conflictividad similar a la vivida durante el primer trimestre del año? En este contexto de interrogantes, tampoco se podía desechar un último: ¿se trataría con dicha estrategia de radicalizar a CCOO para que dividiera internamente, y así asestarla un golpe definitivo? No se podía tampoco rechazar este planteamiento cuando ya se había tanteado el mismo terreno hacia menos de un año.

Fuera como fuese Gobierno, UGT y CEOE venían negociando en secreto desde el 28 de agosto. Más concretamente entre la celebración de quinta y la sexta reunión plenaria a lo que se sumarían otras tantas las reuniones técnicas¹⁸⁵, sin que los negociadores de Comisiones Obreras hubieran sospechado nada raro más allá de la habitual sintonía de posiciones. Lo que, a su vez, reflejaba una considerable frialdad por parte de los negociadores de CEOE y UGT, y claro está de Trabajo, sentados, frente a frente, con los de CCOO en las reuniones del 30 de agosto y del 3 de septiembre en una misma mesa. En todo caso, especialmente significativo era el papel que había decidido jugar UGT, a quienes días después de iniciar las reuniones secretas se les había convidado públicamente a establecer un marco de unidad de acción y no lo habían rechazado explícitamente.

¹⁸⁴ Sobre las dificultades internas dentro del socialismo daría buena cuenta Francisco Bustelo en un artículo de opinión en *El País* publicado en aquellas mismas fechas. Al calor de los primeros roces y enfrentamientos en torno al tema del OTAN, y tras criticar el extendido *triumfalismo* en el seno del PSOE, señalaba en relación a la política económica: «En materia económica se está aplicando una política quizá inevitable en los tiempos que corren, pero un tanto extraña en un Gobierno socialista, ya que lo que se persigue a corto plazo es conseguir que el empresario gane más, y el trabajador, menos. Si tan palmaria contradicción con el credo socialista no se explica [...] será difícil evitar que muchos trabajadores dejen de votar al PSOE». No termina, pues, para autoexplicarse el camino emprendido se preguntaba: «¿quizá obedezca a una honda convicción de que se hace lo que se debe hacer, al margen de lo que piense el elector y el propio militante socialista». Para terminar reclamando un *giro a la izquierda*. BUSTELO, Francisco, “De los defectos del PSOE y sus posibles remedios”, *El País*, 9 de septiembre de 1984.

¹⁸⁵ Noticia, “Aplazada una reunión del Acuerdo Económico y Social”, *El País*, 6 de septiembre de 1984.

Por lo que se pudo saber por la extensa noticia firmada por Gustavo Matías –en tanto desde *ABC* directamente omitirían aquella filtración como en otros tantos casos– la primera reunión tendría lugar durante una “cena de trabajo”. Eufemismo *ex novo* para encubrir lo que no dejaba de ser lo que el mismo periodista llamaba una “reunión secreta”. Confirmada por uno de los asistentes –sin más detalles– asistirían Joaquín Almunia, Juan Jiménez Aguilar, Fabián Márquez, José Luis Corcuera y José María Zufiaur a la misma. Con datos más o menos contradictorios, en tanto una de las fuentes consultadas negaba la presencia de Zufiaur a la par que se hablaba de una reunión de Trabajo con Comisiones Obreras que no sería confirmada –y de la que no quedado ningún rastro–; también se conocía como además de aquella *cena de trabajo* había habido otros tantos “encuentros también secretos” de carácter “técnico” –eso sí– en donde se habían perfilado las líneas maestras del AES, empezando por la política de moderación salarial que se fijaría muy probablemente en el 7%. Además se llegarían acuerdos o acercamiento de posiciones en temas claves que ni siquiera se han discutido en las “reuniones oficiales”: reducción de tipos de interés, reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, incremento en la inversión pública, ventajas fiscales de cara a la inversión privada, “nuevas facilidades para la contratación y el despido” y “un acuerdo definitivo sobre el reparto del patrimonio sindical”. Medidas todas ellas demandadas por la patronal, a excepción de esta última y no de forma completa. A cambio, “se renunciaba a conseguir de inmediato las reformas exigidas (Presupuestos del Estado, Seguridad Social, empresa pública, flexibilizar el mercado de trabajo mediante una ley de primer empleo y otra reforma del Estatuto de los Trabajadores)” y por otro lado se “admitía por vez primera la posible creación de un fondo de solidaridad”, junto con la citada moderación salarial.

De lo avanzado de esas mismas negociaciones –y más allá de lo que prensa quiso informar– puede dar también buena cuenta como desde la Ejecutiva del PSOE se manejaba a principios de septiembre un *informe reservado* –localizado en el AHFFLC– con cada una de las posiciones de los interlocutores sociales, incluida CCOO, con respecto a los Presupuestos de la Seguridad Social. Y en donde se hacía un conciso examen de las posibilidades presupuestarias del Ejecutivo a la hora de incrementar determinadas partidas, de cara a facilitar las negociaciones¹⁸⁶.

No eran pocas las renunciaciones por parte de UGT, aunque como se citaba en la noticia a cambio esperar ganar “apoyo e influencia en la política económica”. Por parte de la patronal –quien salía claramente beneficiada de los temas acordados– se aseguraba en esas condiciones un marco de relativa tranquilidad laboral –eso sí con el apoyo exclusivo de UGT quien había dado palpables muestras de cómo manejar la desmovilización obrera con mayores o menores éxitos– pero sobre todo se evitaba la muy retoma posibilidad de que el Gobierno adelantara las elecciones, en un momento de profunda debilidad política de la derecha quien no tendría tiempo para reorganizarse debidamente para tal proceso. El fantasma del ANE volvía a rondar aunque con la exclusión ahora de CCOO y de CEPYME.

Tan decididos estaban a firmar el acuerdo lo antes posible que estos mismos interlocutores, habían decidido a espaldas de CCOO establecer una serie de “reuniones bilaterales” en un principio *públicas y abiertas* para la siguiente semana –del 10 al 16 de septiembre– y así llegar a tiempo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 1985. En este punto quedaban por resolver dos grandes cuestiones: la amplitud de la reducción del coste del dinero así como los límites de la ofensiva radical flexibilizadora de la CEOE.

La iniciativa de tal maniobra partiría de Felipe González y de José María Cuevas. Días después se sabría la razón: las declaraciones de Marcelino Camacho del 26 de agosto tras la celebración de la quinta reunión plenaria, indicando que Comisiones Obreras no se retiraría, en modo alguno, hasta el final de las negociaciones del AES. Puestos de acuerdo, sin mayores contratiempos, se habían iniciado las “cenas de trabajo”, las reuniones técnicas y los encuentros oportunos. Ni González lo negó ni Cuevas lo confirmaría ni desmentiría, tan sólo guardaría un

¹⁸⁶ AHFFLC, PSOE, “Informe sobre las posiciones mantenidas por el Gobierno y los interlocutores sociales en la negociación de la concertación social”, Madrid, septiembre 1984, sig. AI-612-01.

prudente silencio. En pocas ocasiones, una advertencia de Marcelino Camacho sería tomada tan al *pie de la letra*.

Dinamitadas las formas y los protocolos, la situación creada por la filtración de la noticia provocaría un conjunto de reacciones, declaraciones e inclusive comunicados de prensa. Las metáforas y los eufemismos –como no podía ser de otra forma– se impusieron en los días siguientes. Fabián Márquez, asesor clave de la CEOE en temas laborales ni confirmaría ni desmentiría la cena, aunque el mismo tiempo reconocería la “celebración de conversaciones al margen de la negociación formal, en las «que se han conseguido avances sobre las líneas generales del acuerdo»”. Por parte del Gobierno, el Ministerio de Trabajo se vería obligado ante la gravedad de lo conocido a publicar un *comentado* comunicado. Un texto cuanto menos singular, pues tras las declaraciones de Márquez, afirmaría como las reuniones “han sido públicas en todo momento y lo seguirán siendo”. Para al mismo tiempo indicar como se “ha producido desde los primeros momentos una serie de contactos bilaterales para facilitar el curso de la negociación, y en alguno de los cuales ha participado el Gobierno”. Afirmando a continuación: “La voluntad del Gobierno, cuando ha participado en contactos de esta naturaleza, no ha sido alcanzar acuerdos que pudieran condicionar la negociación que se lleva a cabo públicamente, en la mesa correspondiente”. Con o sin comunicado, desde CCOO, en boca de Marcelino Camacho, la filtración de las reuniones constituía un “hecho grave, una felonía, en un sentido de deslealtad y tradición”. Calificando, a su vez, tales hechos de mediocridad política y que, en ningún caso, afectaría a la unidad interna de Comisiones Obreras¹⁸⁷.

En lo referente a la reacción y declaraciones al respecto de la UGT, han de enmarcarse las mismas en la dificultad de conocer realmente quien estuvo presente en las denominadas reuniones bilaterales. La fuente que emplea Gustavo Matías –“fuente próxima al ministerio de Trabajo”– descartaba la presencia de José María Zufiaur, lo que refuerza lo que aquí se llamará el *factor Corcuera*. No era la primera vez que su nombre aparecía vinculado a declaraciones y movimientos de cara a facilitar la negociación, hasta el punto de mostrarse dócil y partidario con las propuestas del Gobierno¹⁸⁸. De hecho, y como han recordado un buen número de protagonistas tiempo después el *factor Corcuera* sería fundamental para desatascar las negociaciones finales del AES, hasta el punto de auto-otorgarse un papel preeminente por encima de la comisión negociadora de UGT, y actuando de forma no clara al margen de la dirección confederal. De esta forma, si se diera fiabilidad a la “fuente próxima al Ministerio de Trabajo” no podría llegar a descartarse que hubiera actuado, en cierta medida, por su cuenta. Todavía más, cuando por activa y por pasiva negaría –junto con Zufiaur, quien declararía al respecto, “[l]o cual no quiere decir [...] que no haya habido o vaya a haber contactos bilaterales”– “rotundamente la existencia de dicha cena”¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Noticia, “El Ministerio de Trabajo admite la presencia del Gobierno en «contactos bilaterales» para el pacto social”, *El País*, 9 de septiembre de 1984. Días más tarde, Camacho –también en Santander– declararía como la exclusión y marginación de Comisiones Obreras «demuestra hasta la saciedad que hay quienes están dispuestos a cometer cualquier felonía, si no avalamos su política económica». Noticia, Víctor Gijón, “Marcelino Camacho afirma que «la concertación social tiene plomo en las alas»”, *El País*, 11 de septiembre de 1984.

¹⁸⁸ Como recordaría Ricardo Martín en la muy amable biografía de Joaquín Almunia, las sospechas sobre Corcuera se iría incrementando progresivamente, tanto por su cercanía con el Presidente como con el propio Almunia, con el que varias veces a la semana jugaba una partida de frontenis: «Paradójicamente, las idas y venidas de Corcuera a la Moncloa para convencer al Presidente de que Solchaga tenía que ceder en su planteamiento principista de la reconversión le ponía entredicho entre sus compañeros ugetistas, que llegaron a juzgarle, tanto en la consecución del Acuerdo Económico y Social (AES) como en el debate de las pensiones, en 1985, más como un sospechoso mediador de Felipe González que como el representante de un sindicato cuyo secretario general, Redondo se estaba distanciando a pasos agigantados de la política económica del Gobierno hermano». MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, op.cit., p. 113.

¹⁸⁹ Portada, “Gobierno, CEOE y UGT han negociado en secreto el pacto para 1985-1986”, *El País*, 8 de septiembre de 1984; Noticia, “Gobierno, CEOE y UGT han negociado en secreto y sin CCOO el

El siguiente paso en esta endiablada carrera por alcanzar y firmar el AES sería la legalización de facto del “secretismo” como la mejor vía para acelerar el proceso. Se llegaba así, en términos leninistas, a la *fase de desarrollo superior* del “modelo de concertación social español”.

12.2.3. Tiempos de «pactos de silencio» (10 de septiembre-25 de septiembre)

«Hubo que *echar agua hirviendo* sobre la representación de Comisiones para forzarla a su abandono».

Joaquín ALMUNIA, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (1982-1986)¹⁹⁰.

1984 se convertiría por meritos propios –tanto estadísticos como no estadísticos– en el año de la conflictividad por excelencia de la época socialista. En medio de una profunda crisis que lejos estaba de que hubiera tocado fondo, con la inflación y un paro descontrolado, con una conflictividad cada vez más radicalizada y una extendida violencia callejera que hacía de la seguridad ciudadana uno de los valores más añorados, se añadiría una *gran catástrofe nacional*: la huelga de los futbolistas profesionales. El lunes 10 de septiembre la noticia no era que el posible acuerdo social por el que tanto había peleado el Gobierno de cara a garantizarse la paz social, estuviera al borde naufragar. No. “La huelga de futbolistas profesionales vació los estadios y arruino las taquillas”; “Navaja en la liga”, eran los titulares de *El País* y el *ABC*¹⁹¹.

Pero también el 10 de septiembre tendría lugar la octava reunión plenaria del AES, aplaza desde el día 6 a petición de la CEOE por el asesinato de dos empresarios a manos del GRAPO en Madrid y Sevilla¹⁹². Una reunión que estaba precedida por las ya comentadas filtraciones a la prensa y las respectivas reacciones que en un escenario repleto de contradicciones y desmentidos, en donde no se sabía si había habido reunión, de trabajo o no, una cena, un encuentro técnico o bilateral, del que, al mismo tiempo, Trabajo tenía constancia pero a su vez lo negaba...

Aquel mismo lunes, en un ambiente cargado de tensión, los representantes de CEOE, Gobierno y UGT ante las lógicas peticiones de Comisiones Obreras de explicaciones, volverían a la vieja estrategia ya urdida: negarlo todo pero sin negar nada. En un tono chulesco Almunia contestaría: “¿Qué reunión? No hace falta desmentir siete veces las cosas. Con una vale”. Corcuera no se quedaría corto tampoco: “Han intentado pedir explicaciones [...] pero no hay que darlas de un proyecto de acuerdo que no existe”. Curiosamente, y a pesar de que los *supuestos* implicados no pasaban de la media docena, no eran capaces de ponerse acuerdo. Como todos buenos profesionales de la política, había días buenos y otros menos buenos¹⁹³.

Dado por superado con tales posicionamientos el “no problema” de las reuniones secretas, las fechas avanzaban y se ponía un primer plazo en firme para cerrar, al menos, los aspectos vinculados a los Presupuestos Generales: el 23 de septiembre. En tal fecha habría un inusual consenso. La palabra pesimista estaría en boca de todos y cada uno de los implicados, incluso por parte de Julián Ariza. En este estado de inacción, CEOE seguiría a lo suyo:

acuerdo económico y social para 1985-1986”, *El País*, 8 de septiembre de 1984; Noticia, “El pacto será ultimado en contactos bilaterales”, *El País*, 8 de septiembre de 1984.

¹⁹⁰ Declaraciones de Almunia a MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, op.cit., p. 128.

¹⁹¹ Portada, “La huelga de futbolistas profesionales vació los estadios y arruino las taquillas”, *El País*, 10 de septiembre de 1984; Portada, “Navaja en la liga”, *ABC*, 10 de septiembre de 1984.

¹⁹² Noticia, “Aplaza una reunión del Acuerdo Económico y Social”, *El País*, 6 de septiembre de 1984.

¹⁹³ En la crónica de Amancio Fernández para *ABC* se insistía especialmente en esta cuestión. «El Ministro de Trabajo declaró que ‘empieza a rebajar su optimismo de cara a conseguir un acuerdo’». Noticia, Amancio Fernández, “Crece el pesimismo sobre la firma del acuerdo económico”, *ABC*, 11 de septiembre de 1984.

endureciendo sus posiciones. Todo les parecía poco, por más que Miguel Boyer –quien se había dignado a asistir a la mencionada reunión plenaria tan sólo media hora para explicar la política financiera del Banco de España– y José Borrell comparecieran durante más de una hora por la tarde aquel lunes para explicar cómo y de qué forma se procedería a la reducción de los tipos de interés¹⁹⁴.

Una tarde en donde también se reunirían las cúpulas de CCOO y de UGT en un encuentro inútil tras la filtración, y más teniendo en cuenta las cada vez mayores distancias entre ambas cúpulas. No obstante, UGT se volvería a mostrar muy dura con Comisiones Obreras al exigirle que especificara, punto por punto, sus propuestas de cara al AES. Algo que desde el sindicato de mayoría comunista se había fijado y presentado públicamente desde hacía meses.

Literalmente la Ejecutiva de la UGT expresaría al respecto de esta última reunión: “Constatando en dicha reunión la imposibilidad de llegar a ninguna concreción con CCOO”. La causa: “toda vez que su único interés es no llegar a un Acuerdo General por considerar que el mismo avalaría la Política Económica y Presupuestaria del Gobierno”. Solventado el trámite de tantear un espinoso terreno con posturas irreconocibles en dichas circunstancias, en todo caso, mucho más preocupaba a la CEC de UGT el repentino “endurecimiento de la CEOE no sólo con el tema concreto de la Fiscalidad, sino en el conjunto de sus intervenciones”. Asimismo se daba hasta el día 13 para la presentación de todas y cada de las posturas, para a continuar tratar de ir cerrando todos los aspectos negociadores¹⁹⁵. Tampoco ni una línea ni un comentario se recogería de la *filtración* de *El País*.

Hasta la siguiente sesión plenaria fijada el jueves 13, el gran teatro de la política bajaría el telón. El martes y el miércoles en medio de fuertes rumores sobre el estado de salud de las cuentas públicas, estaría dedicado al reajuste de estrategias en las cúpulas de los sindicatos y de la patronal así como a la toma de posiciones frente a un Consejo de Ministros que duraría tres días seguidos¹⁹⁶. En realidad poco trascendería de aquellas reuniones¹⁹⁷, a excepción de la acusación de Trabajo contra Comisiones Obreras de entorpecer y ralentizar las negociaciones por haber convocado la reunión de su Comisión Ejecutiva durante el miércoles 12 y el jueves 13 de septiembre, cuando llevaba convocada más de una semana la novena reunión. Y, aprovechando la regañina paternalista, también se daría conocer, mediante la filtración oportuna, como el Gobierno mantendría la subvención sindical –1.035 millones de pesetas en total– que establecida inicialmente en el ANE finalizaba en 1984 y que se prorrogaba durante el siguiente año¹⁹⁸.

Justamente de la reunión de la Comisión Ejecutiva de CCOO se volvería a decidir no moverse de la mesa de negociación, pero sobre todo seguir luchando por un acuerdo social más justo para el cual se solicitaría un debate en TVE. También se dejaría bien claro en una clarificadora votación –35 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones– que en “función de la

¹⁹⁴ Noticia, Gustavo Matías, “El Gobierno quiere firmar el acuerdo económico y social con patronal y sindicatos antes del día 23 de septiembre”, *El País*, 11 de septiembre de 1984.

¹⁹⁵ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 41. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 11 de septiembre de 1984”, sig. 002251-003.

¹⁹⁶ Un ejemplo: Portada, “No se podrán pagar las pensiones”, *ABC*, 11 de septiembre de 1984; Editorial, “Reforma urgente y radical”, *ABC*, 10 de septiembre de 1984.

¹⁹⁷ Por lo que se pudo saber de las reuniones de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de la CEOE, de las mismas saldría la petición de una reunión para tratar los atentados contra los empresarios. En cualquier caso, en la declaración correspondiente de Cuevas a la salida de la última reunión, reafirmaría su escepticismo sobre las posibilidades de firmar un acuerdo durante la siguiente semana. Noticia, “CEOE quiere tratar con el presidente del Gobierno sobre los atentados a empresarios”, *El País*, 13 de septiembre de 1984.

¹⁹⁸ Noticia, “El Gobierno destinará 1.035 millones en 1985 para los sindicatos”, *El País*, 13 de septiembre de 1984.

marcha de las negociaciones, promover una jornada de acción, situándola hacia últimos días de octubre o primeros de noviembre”, aunque se descartaba una huelga general. Informar y tensar a la organización, se constituía en una tarea prioritaria para Comisiones Obreras, en medio de un apretado calendario de reuniones al respecto.

Por lo demás, los cauces por donde, hasta el momento, había transcurrido la negociación, venían a “mostrar con claridad la escasa voluntad del Gobierno”, según se recogía en una resolución de la propia Ejecutiva. Sin mayores referencias tampoco a las reuniones secretas ni a la UGT, cargarían contra Gobierno y patronal. “Las propuestas del Gobierno se limitan a los contenidos en su proyectos de Presupuestos Generales del Estado, que mantienen en lo esencial la política económica de ajuste duro”, se podía leer. Se denuncia, la “reducción drástica de las inversiones públicas”, pero sobre todo las pretensiones de ir hacia una “mayor precarización del empleo mediante la extensión de contratos temporales y otras modalidades”. Por si faltaba algo, a la actitud de bloqueo de la CEOE se había añadido su reivindicación del “despido libre y su abaratamiento hasta hacerlo prácticamente gratuito”. De cara despejar alguna duda, se firmaría asimismo como “CCOO seguirá aportando su esfuerzo, y alternativa en la mesa de negociación hasta el último momento en la dirección de conseguir el acuerdo necesario para crear empleo”¹⁹⁹.

Ya desde principios de septiembre, resultaban cada vez más palpables las prisas del Gobierno por cerrar las negociaciones del AES, llegándose a proponer –siendo rechazado– el mismo lunes 10 que la reunión continuará por la noche una vez que hubiera finalizado el Consejo de Ministros. Tales eran las *prisas* que se había llegado al compromiso de celebrar a partir del jueves “sesiones nocturnas” prácticamente seguidas, para llegar al sábado y al domingo 23 –fecha límite– con los principales puntos acordados²⁰⁰. Parecía, pues, que la negociación entraba en una *fase decisiva*.

En la sesión plenaria del jueves 13 –la novena pública, plenaria y oficial– se extendería durante más de siete horas y concluiría pasada la medianoche. Allí se alcanzaría una nueva cuota de la instrumentalización a la par que de perversión de los canales de negociación del pacto social. El “modelo español de concertación social”, ahora sí, pasaría a la citada *fase de desarrollo superior*. De forma totalmente democrática, el triunvirato formado por Gobierno, CEOE y UGT decidirían excluir de forma total la mayor parte de las propuestas de CCOO. Una clara invitación –que también se puede traducir como una *expulsión formal*– a que abandonara de una vez la mesa de negociación. No hubo forma. La consigna de “nos quedamos” cada día se hacía más fuerte.

Decisión adoptada: auto-convocarse en reuniones bilaterales y trilaterales de *tono clandestino* en tiempos democráticos, de cara a acelerar las negociaciones, siendo la CEOE su promotora. Tampoco habría forma de “convencer” a Comisiones Obreras de implicar en tal operación por razones más que obvias. Puestos a la búsqueda de metáforas justificadoras –o llegados el caso expiatorias de culpas o malas conciencias– en aquella ocasión se hablaría de “Comisiones restringidas”, en donde cada uno de los dos representantes por organización se conjuraban para mantener un *pacto de silencio* hasta que finalizará la negociación. Una *modalidad de pacto de silencio* que se legitimaba por vía pseudo-legal y adquiría un rango casi estatutario. Eso sí, según el mismo Ministro de Trabajo, en ningún caso, se podía hablar de “reuniones secretas”. Más aún el propio Almunia no emplearía en sus *memorias políticas* el término “auto-exclusión” que como hemos visto sirvió en su momento para justificar la maniobra contra Comisiones Obreras, sino que directamente hablaría de cómo abandonarían las reuniones llegados a este punto:

¹⁹⁹ AHT, CCOO-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal de los días 12/13-IX-1984”, sig. 001-00046, en donde se incluía: “Resolución de la Comisión Ejecutiva de CCOO. Celebrada en Madrid los días 12 y 13 de septiembre”.

²⁰⁰ Noticia, “Patronal y Sindicatos perfilan sus estrategias de cara al acuerdo económico y social”, *El País*, 12 de septiembre de 1984.

«Tras varias reuniones y después de consultarlo con UGT y CEOE, planteé con claridad a Julián Ariza, que encabezaba la delegación de Comisiones, si creía o no en la posibilidad de lograr un acuerdo. Julián reconoció que su sindicato no quería corresponsabilizarse en un pacto de esa envergadura, y su delegación abandonó la mesa de negociación»²⁰¹.

Así pues, el *silencio* de los negociadores profesionales se impuso. A partir de ahí, una nueva fecha volvería a aparecer como clave: el martes 18 de septiembre. De cualquier de las formas, de aquella reunión plenaria –la novena desde julio– si se saldría con un agenda concreta de los temas negociables: temas con repercusión presupuestaria, Seguridad Social –en donde se había vuelto a “colar” el tema de la reforma de las pensiones sin que desde UGT se denunciara de forma pública (que no de forma interna) este flagrante incumplimiento– participación institucional, política de rentas –con revisión incorporada de la política de cobertura de desempleo– y mercado de trabajo, en donde se incluía el desarrollo legislativo de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. También por primera vez se hablaría del tipo de *naturaleza del acuerdo*. Aspecto central, en tanto una vez descartada la firma de Comisiones Obreras, surgía la posibilidad jurídica de que los acuerdos a los que se llegará a nivel interconfederal, pudieran carecer de la representatividad necesaria para que fueran de aplicación general. No eran pocas las dudas al respecto, dejándose de momento el asunto en la mayor de las indefiniciones. Lo que si parecía quedar claro es que se trataría de un pacto a “dos velocidades” tanto por la “insistencia del Gobierno y UGT”. Primero, firmar un acuerdo marco y posteriormente desarrollarlo²⁰².

Sabedora la Unión General de Trabajadores de que volvía *navegar* en la soledad sindical *oficial y no oficial*, tan deseada como buscada; continuaría con su campaña pública –o al menos, la destinada a sus afiliados– de que no se firmaría ningún cheque en blanco. De hecho, por primera vez, daría a conocer públicamente sus posiciones en un número de *Unión*. Y no era poco lo que allí se venía a contar. Todo ello por y a través de una adopción de posiciones que inclusive se había escamoteado a los asistentes del Comité Confederal de junio pasado²⁰³. Más aún, pues, el radicalismo político-verbal del verano no parecía decaer en el cercano otoño: “UGT no firmará este Acuerdo a cualquier precio, sino únicamente si tiene un contenido asumible”. Sin renunciar a sus tradicionales señas de identidad –sindicato *responsable y negociador*– se decía: “Lo que queremos es que haya un Acuerdo con contenido, que se adopte una política de solidaridad, entendido este término en un sentido progresista, de justicia social y no en su contra”. Curiosamente en el cuadro que aparecía sobre los avances de la reunión del día 13 se dejaba en un largo secundario el tema de la reforma de las pensiones –en realidad se omitía dichas palabras, refiriéndose a la Seguridad Social, como concepto más generalizador– planteando que eran cuestiones a más largo plazo a discutir²⁰⁴. Una interpretación que no casaba con exactitud con lo que informaba la prensa.

Con Comisiones Obreras excluida formal pero no oficialmente, desde la patronal, sabedora del nuevo cambio de correlación de fuerzas, no se tendría el mayor inconveniente en lanzar otra de sus conocidas ofensivas. Se habían acabado las buenas formas también por este lado. Retomando sus posiciones ya defendidas en el verano y otoño de 1983, volvía a introducir en la agenda –con el beneplácito del Gobierno– la cuestión de la “libertad de despido” y la “supresión de cotizaciones de la Seguridad Social”, mientras que durarán las suspensiones relacionadas con los ERE’s. En este contexto tan propicio, desde el Ministerio de Trabajo se entregaría en una “comisión restringida” –celebrada el 14 de septiembre– la nueva versión del

²⁰¹ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, op.cit., p. 172.

²⁰² Noticia, Gustavo Matías, “Gobierno, CEOE y UGT excluyen del Acuerdo Económico y Social en negociación gran parte de las propuestas de CCOO”, *El País*, 14 de septiembre de 1984.

²⁰³ “Planteamiento global de la UGT”, *Unión*, n° 57, (1984), p. 5.

²⁰⁴ “Con las espadas en alto” (pp. 1 y 3-4), “Marco del posible acuerdo alcanzado el día 13 de septiembre” (p. 13), ambos en, *Unión*, n° 57, (1984),

proyecto de 18 folios de desarrollo legislativo de la RET'84. Con la velocidad y capacidad de análisis tan característica de la CEOE, en aquel mismo encuentro ya emitirían una razonada opinión: tales borradores les seguían pareciendo insuficientes. Lanzada su ofensiva, ya hablarían de suprimir directamente el artículo 51 del ET con el objetivo de eliminar los trámites administrativos en despidos colectivos, a la par que introducía en el debate la referencia a una directiva de la Comunidad Europea –como argumento técnico-jurídico– de la que en las siguientes semanas se hablaría largo y tendido²⁰⁵. Por tanto, la expulsión “no oficial” de CCOO, le abriría el camino de cara a exponer su programa de máximos.

Aunque el “pacto de silencio” se mantendría en líneas generales, no faltarían las filtraciones parciales, que muy débilmente permiten hacerse una idea de lo que los avances de las “comisiones restringidas”. Así se sabría que durante las reuniones del viernes 14 y del sábado 15 se alcanzaría una serie de principios de acuerdo en temas previamente cerrados – desde la revisión de las pensiones al Fondo de Solidaridad– dejando para las reuniones plenarias y públicas los temas más complicados –política de rentas, cuentas de la Seguridad Social–. Todo ello a través de una lógica negociadora que no aventuraba nada positivo²⁰⁶. También se conocería el lunes 17 de septiembre que desde la CEOE se habían endurecido muy considerablemente sus posiciones. Una vez más, cabe añadir. Junto a sus propuestas en torno al “despido libre” se sumaba su ortodoxa posición al respecto de la política de rentas. Disparada la inflación, rotas las previsiones gubernamentales, las muy tibias cláusulas de revisión pactadas durante el primer trimestre del año –allá en las escasas empresas en donde se habían firmado– comenzaban a entrar lentamente en funcionamiento en aquellas mismas semanas. De esta forma, si hasta el momento el tema de las bandas salariales no había constituido un obstáculo serio, se convertiría, en adelante, en complicado obstáculo en el avance de las negociaciones, ante la propuesta de la CEOE de situar la banda salarial entre el 5,5% y 7,5%, con una nota añadida, “sólo en el caso de que los convenios no rigen luego cláusulas de revisión o éstas no garanticen más que un porcentaje de inflación equivalente a la subida salarial de cada convenio”. Dicho en otras palabras, el nuevo objetivo de la patronal pasaba vaciar de contenido un elemento central de la negociación colectiva: las cláusulas de revisión. Otro de sus objetivos históricos. Pero todavía se iba mucho más allá –a pesar de no poder confirmarse, de forma plena, tales pretensiones por el “pacto de silencio”– al negarse también, por activa y por pasiva, a que los empresarios contribuyeran con ni una sola peseta al Fondo de Solidaridad²⁰⁷.

Desde Comisiones Obreras se trataría de ganar tiempo. Sin nada que perder, solicitaría un debate público en TVE para denunciar su situación de “indefensión”. Una propuesta que ni siquiera sería atendida ni menos contestada. “Boyer y Cuevas se han cargado otra vez, como el año pasado, toda posibilidad de acuerdo, pues el último Consejo de Ministros, al bajar a la vez el gasto público, el déficit y la presión fiscal, ha demostrado la voluntad de mantener su política económica, que coloca a los sindicatos en situación de debilidad”, declararía Antonio Gutiérrez el sábado 15²⁰⁸. Por su parte, Camacho, hablaría de que tal y como se estaba negociando la

²⁰⁵ Noticia, Gustavo Matías, “El Gobierno acepta discutir las propuestas de la CEOE sobre libertad de despido”, *El País*, 15 de septiembre de 1984.

²⁰⁶ Noticia, Gustavo Matías, “Gobierno, patronal y UGT intentan concretar este fin de semana la parte menos conflictividad del pacto”, *El País*, 16 de septiembre de 1984.

²⁰⁷ Noticia, Gustavo Matías, “La negociación salarial, endurecida por la entrada en vigor de las revisiones para 1984”, *El País*, 17 de septiembre de 1984. También se daba a conocer en aquella noticia un informe de la CEOE que se había entregado a su Junta Directiva, y en el que resaltaba el siguiente párrafo: «De hecho, en nuestras previsiones a comienzos de año ya hicimos hincapié en que, dada la evolución histórica reciente de precios y costes, el verdadero avance en la desaceleración de precios sólo podría producirse en los cuatro últimos meses del presente año, lo que condicionó notablemente las negociaciones en torno a la cláusula de revisión, haciendo imposible el acuerdo sobre concertación social para el presente año».

²⁰⁸ Véase aquí, AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 18-IX-1984”, sig. 005-011.

política de rentas se podría perder hasta tres puntos de poder adquisitivo²⁰⁹. Pero no sólo, pues, según los cálculos de las propias Comisiones Obreras, en la situación en la que se encontraba el AES en dicho momento supondría un recorte de “300.000 millones” de pesetas de los Presupuestos Generales del Estado”. No obstante, lo más significativo de las declaraciones del Secretario General de Comisiones Obreras en la fiesta de la minería de Asturias se centraría al respecto de qué haría su organización en caso de firmarse el AES en esa situación descrita. Tras anunciar un “otoño caliente”, en cualquier caso, se negaría la posibilidad de ir hacia una huelga general, tal y como se había dejado constatado y aprobado por parte del SC. De hecho, la frase clave de aquel mitin sería la siguiente: “en ningún momento nos echaremos al monte”²¹⁰. Una expresión que se ha de contextualizar adecuadamente, en tanto en meses anteriores no se había descartado esa posibilidad, aunque nunca se llegar a pasar de las simples declaraciones. Entonces, ¿a qué obedecía este anuncio? ¿Era acaso una muestra de “debilidad interna” y de “renuncia política”? O bien, ¿constituía una señal de responsabilidad e inteligencia política conociendo la correlación de fuerzas y la falta de alternativa política? Fuera cual fuere la respuesta, aquella postura tendría una considerable relevancia en los siguientes meses.

A menos de 24 horas de la siguiente sesión plenaria, la Ejecutiva de UGT aún estaba digiriendo el nuevo *varapalo gubernamental* acerca de la reformas de las pensiones. Probablemente, y de cara a no enturbiar más el por sí enrarecido panorama, optarían por tratar de mantener el asunto a nivel interno. Con todo, el enfado era palpable en la reunión de la CEC del 17 de septiembre. Mientras que, por un lado, se destacaba como las reuniones bilaterales comenzaban a dar sus frutos, en tanto se había avanzado en no pocas cuestiones –entre otras se citaban, sistema fiscal, empresa pública o inclusive los incrementos salariales–. Por otro, se advertía en un tono serio: “se considera que no es posible incorporar al AES lo relacionado con la Reforma de las Pensiones de la Seguridad Social”. El motivo: “en función de que la misma se tiene que hacer dentro de un contexto general de Reforma de toda la Seguridad Social y por el propio coste político que la Reforma llevaría consigo”. El mensaje no podía ser más claro desde entonces: rechazas todas y cada de las pretensiones gubernamentales en ese sentido²¹¹. ¿Sería posible? ¿A qué coste? Pero sobre todo, ¿qué nivel de confianza seguir depositando en el Ejecutivo tras este último movimiento estratégico no previsto? ¿Aguantaría la Ejecutiva tal invite?

El martes 18 de septiembre estaba convocada la décima reunión plenaria del AES. La misma no se celebraría hasta unos días después. El motivo: la decisión unilateral de los miembros de las “comisiones restringidas”. El argumento oficial esgrimido entonces: la necesidad de que se concretarán por escrito las posiciones presupuestarias fijadas en el Consejo de Ministros celebrado el lunes 17. Rodolfo Serrano –quien desde entonces se volvería hacer cargo de las crónicas laborales del AES, empleando sus consabidas dotes informativas a la par que opinativas– citando sus propias “informaciones solventes”, informaría de cómo el Ministro de Trabajo había mantenido dos *reuniones bilaterales* –“que no secretas” en palabras de Corcuera reproduciendo milimétricamente la posición de Almunia al respecto– con CCOO y UGT. Si de la reunión con el *sindicato hermano* no trascendería nada más allá de sus discrepancias mínimas al respecto de los Presupuestos Generales, desde Comisiones Obreras se filtraría parte de la reunión. No sólo rechazarían la enésima invitación a sumarse a las “comisiones bilaterales” sino que mantendría su posición de no moverse de la mesa oficial en el afán de influir en la redacción final del AES²¹².

²⁰⁹ Noticia, Gustavo Matías, “Gobierno, patronal y UGT intentan concretar este fin de semana la parte menos conflictiva del pacto”, *El País*, 16 de septiembre de 1984.

²¹⁰ Noticia, “Camacho anuncia un otoño caliente si no cambia la política económica”, *El País*, 17 de septiembre de 1984.

²¹¹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 42. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 17 de septiembre de 1984”, sig. 002251-003.

²¹² Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno hará mañana su oferta definitiva sobre el acuerdo social”, *El País*, 18 de septiembre de 1984.

Con un Boyer prácticamente desaparecido de la primera escena política y mediática, el martes 18, continuarían las “reuniones bilaterales” con la UGT y la CEOE —ésta última también se entrevistaría con el Presidente del Gobierno para tratar el tema de los atentados contra los empresarios²¹³— de cara a darles la información oportuna sobre las decisiones del Consejo de Ministros. En medio de un *apagón informativo* que duraba ya varios días, también se sabría que la aplazada reunión del día 19 volvería a ser aplazada mediante los cauces democráticos ya explicitados en anteriores ocasiones. Y todo ello con un fin no declarado: evitar públicamente la constatación de un nuevo fracaso de las “comisiones restringidas”. Y otro indiscutible: evitar las posibles críticas de Comisiones Obreras.

Según se acercaba la fecha del 23 de septiembre, cada vez parecían mayores las diferencias de los tres interlocutores. Nada nuevo, que no se hubiera visto antes. De hecho, la semana entre el 19 al 25 de septiembre alcanzaría una enorme intensidad, en donde los enfrentamientos a punto estarían de hacer naufragar el AES. En una progresiva aceleración de los tiempos políticos se volverían a repetir las maniobras del año anterior: un endurecimiento ya radical de la CEOE, sumadas a las progresivas cesiones de la UGT, junto con una campaña mediática impulsada por *El País* —sin gran éxito en esta ocasión— contra las Comisiones Obreras como la principal responsable de las dificultades por las que atravesaba el AES. El objetivo de tal maniobra sencillo: desviar la atención mediática de las propias complicaciones del proceso negociador.

“No existe hasta el momento acuerdo alguno en los aspectos básicos del futuro pacto”, afirmaba Rodolfo Serrano en su crónica laboral del 20 de septiembre. Las discrepancias se habían extendido ya no sólo a la flexibilización laboral o las cotizaciones a la Seguridad Social, sino también al Fondo de Solidaridad y las inversiones públicas programadas, en las diarias reuniones de las “comisiones restringidas”. Ni siquiera así serían capaces de llegar a la elaboración de un protocolo de bases mínimas sobre las que avanzar. Una idea rechazada totalmente por la patronal para quien o se firmaba un texto completo y cerrado o no se firmaba nada. Pero desde la CEOE dispuesta a ganar también el tiempo necesario, en una maniobra de carácter político antes que económico, se conocería unos días más tarde como seguía en su posición de no aportar absolutamente nada al Fondo de Solidaridad, así como solicitaba una rebaja de 1,5 puntos en sus cotizaciones a la Seguridad Social. Una reducción que inclusive para un Gobierno como el socialista no podía asumirse, por más que se le calificaran a las mismas —en un sentido claramente progresista— como “impuesto sobre el empleo”. Sin embargo, el principal punto de inflexión lo seguían constituyendo las pretensiones patronales de eliminar el artículo 51 del ET.

Asimismo el cronista laboral de *El País* por *motu proprio* dejaba caer al citar una reunión entre CCOO y la CEOE celebrada en la tarde del martes 20, el siguiente comentario: “La actitud de CCOO en el acuerdo lleva a preguntarse quién ganó realmente el pasado congreso confederal, por encima de las resoluciones aprobadas”. A lo que a continuación se le acompañaba de una justificación de los métodos negociadores implantados²¹⁴.

El transcurrir negociador más que avanzar en la segunda mitad de la semana retrocedía, hasta el punto de que CEOE estaría a punto de abandonar una de las “comisiones restringidas” —“la CEOE abandonó durante unos instantes la sala donde se celebraba la entrevista”—ante la negativa rotunda de UGT con respecto a la propuesta de “despido libre” de la patronal. En un cada vez más espeso manto de silencio, desde el Ejecutivo también procedería a endurecer sus posiciones, al menos, en cuanto a los plazos límites. Dado por descontado que el domingo 23 se pudiera llegar a alcanzar el acuerdo, se daba como nueva fecha límite el miércoles 26 en una amenaza sin mayor trasfondo de Almunia, quien indicaría —el jueves 20— que con o sin

²¹³ Noticia, “Felipe González recibe al presidente de la patronal para analizar el acuerdo social”, *El País*, 19 de septiembre de 1984.

²¹⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “Las diferencias entre Gobierno, CEOE y UGT aplazan de nuevo la negociación del acuerdo”, *El País*, 20 de septiembre de 1984.

acuerdo no se podría tocar los Presupuestos Generales en adelante, teniéndose que conformar – en dicho caso– los interlocutores con negociar el resto de los temas de la mesa sin incidencia presupuestaria. Ahora bien, puestos a ser flexibles y acuciados por la necesidad imperiosa de llegar a cualquier tipo de acuerdo, se planteaba la posibilidad de introducir las modificaciones oportunas en el trámite parlamentario.

Por lo demás, en el transcurso de la celebración de la décima reunión plenaria del día 20 jueves –tantas veces aplazada– no se avanzaría absolutamente nada. No obstante, allí se trataría –sin mucho entusiasmo– de volver a atraer a CCOO a las reuniones secretas, siempre y cuando se comprometiera a mantener el “pacto de silencio”. La respuesta de Comisiones Obreras volvería a ser no, a lo que se le acompañaría el mismo día de una carta al Presidente del Gobierno pidiendo una entrevista para reconducir la situación. Desde UGT ya se mostraría su más firme rechazo a que ni siquiera se la siguiera convocando a las reuniones plenarios²¹⁵. Así pues, la central socialista se convertía, a su manera, en la vanguardia del “modelo español de concertación social” una vez alcanzado éste su fase superior.

No obstante, muchos menos prepotentes los representantes ugetistas se mostrarían con el Gobierno en la reunión de “carácter reservado” –metáfora empleada en otras ocasiones y que ahora se recuperaba– del viernes 21. Por lo que se quiso filtrar, las cantidades puestas sobre la mesa por el Ejecutivo no podían ser aceptadas incluso por la UGT. De este modo, en un ambiente de creciente pesimismo, se indicaría como “el encuentro registró serias tensiones cuando la UGT planteó que había que especificar el destino de las nuevas partidas presupuestarias”²¹⁶.

Sin citar fuente ninguna –ni siquiera con el clásico recurso de “fuentes bien informadas” o “cercanas a...”– la información laboral de Rodolfo Serrano –quien tan sólo firmaría su crónica con sus iniciales– el viernes 21 de septiembre –justo en un momento en donde el “pacto de silencio” se evidenciaba casi sin fisuras– estaba dedicada al supuesto “drama interno del sindicato”. “Un sector hasta ahora minoritario de Comisiones Obreras, y encuadrado dentro de la segunda fila de la organización [...] no está de acuerdo con la forma en que los responsables del sindicato se han planteado la negociación del acuerdo”, declaraba –insistimos– sin aportar un solo nombre, un solo dato o una sola pista en un momento de parálisis negociadora. Aunque si se toma el tiempo de sumar hipótesis y demás caminos de aproximación previamente ensayados, es, probable, que la fuente de información viniera de los representantes de la Corriente Socialista Autogestionaria.

En esta enésima campaña de intoxicación se hacía eco, en dicha ocasión, de la preocupación de ciertos “sectores” (anónimos) de que Comisiones Obreras se viera “marginada” del acuerdo especialmente de cara a gestionar los aspectos sociales del futuro Acuerdo. Sin volver a citar ningún tipo de documento, indicaba: “[a]rgumentan también que el acuerdo, siendo coherentes con las resoluciones del pasado congreso confederal, habría que firmarse, tratando que fuera lo más favorable para los trabajadores”. Tras recordar las divisiones entre las diferentes corrientes que habían protagonizado el mencionado Congreso Confederal de junio, continuaba afirmando como los “sectores que consideraba suicida no firmar el acuerdo tampoco comparten que CCOO haya hecho bandera del secreto de las reuniones”²¹⁷. Lo cual, por cierto, no coincidía con lo que se había dicho anteriormente ni con la realidad propiamente dicha.

Por lo demás, en un empeño desmedido por resaltar las virtudes del secretismo, el mismo periodista en la siempre importante edición del domingo de *El País*, publicaba un

²¹⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “Mayores diferencias entre Gobierno, patronal y sindicatos a cinco días de cerrar definitivamente los presupuestos”, *El País*, 21 de septiembre de 1984.

²¹⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “UGT considera la propuesta presupuestaria del Gobierno insuficiente para lograr el pacto”, *El País*, 22 de septiembre de 1984.

²¹⁷ Noticia, R. S., “Sectores de CCOO defiende la firma del acuerdo social”, *El País*, 21 de septiembre de 1984.

reportaje sobre las formas en que habían transcurrido las anteriores negociaciones empezando por el ANE. En un relato más propio de un guión televisivo terminaría revelando el gran secreto de las reuniones privadas anteriores y presentes: “un pacto de caballeros que [siempre] se cumple”²¹⁸.

El fin de semana entre el 22 al 23 de septiembre que se esperaba tan decisivo transcurría con una muy relativa normalidad “gracias” al *pacto de silencio*, y a la pericia de los negociadores en no revelar absolutamente nada al respecto. Tal sería el sigilo que lo máximo que se filtraría es que habían seguido los “contactos reservados” y que “no se había registrado acuerdo alguno”²¹⁹. A menos de un día para la fecha límite establecida por el Gobierno –tras el primer aplazamiento– *El País* abría su portada con un titular que era un fiel reflejo del nerviosismo por el que estaba atravesando el Gobierno, que veía que se podía repetir la reciente historia del AI’84. “Boyer suspende su viaje al FMI por dificultades en el acuerdo social”, era el titular. La entradilla tan poco infundía mucho ánimo: “las posturas [...] parecen cada vez más alejadas”. Si Boyer parecía “especialmente preocupado” es que las cosas iban realmente mal²²⁰.

Aquel 25 de septiembre estaba prevista la undécima reunión plenaria del AES –cita que no llegaría a celebrarse– en medio de una tensión que estaba alcanzado cuotas considerables pero que no había tocado techo todavía. En un reportaje bastante extenso –a pesar del mantenimiento casi estricto del “pacto de silencio”– que aunque, en cierta parte, era un *refrito* de las noticias anteriores, Rodolfo Serrano dejaba apuntado en entrelíneas dos ideas centrales de por donde se movía la negociación. Primero, se indicaba como a pesar de que la CEOE dada por pérdida la batalla en relación a los PGE, en cualquier caso, cabía razones para el optimismo, “porque aunque sea de forma insuficiente, ha conseguido que la mayoría de sus reivindicaciones hayan sido consideradas por los representantes del Gobierno”. La patronal que había ido ganando peso con el paso del tiempo, especialmente tras la expulsión formal de CCOO de la mesa de negociaciones, había visto en el AES otra brillante oportunidad para introducir sus reivindicaciones de máximos. Tras examinar los anteproyectos de reales decretos de desarrollo de la RET’84 –con un claro componente liberal y flexibilizador como se explicará más adelante– lógicamente no les parecía suficiente²²¹, tanto por las formas como por los contenidos. La patronal sabedora que todo tenía su *precio político* se mostraría dispuesta a hacer la “vista gorda” a las anteriores medidas siempre y cuando la Administración se decidiera de, una vez por todas, a llevar adelante la supresión del *famoso* artículo 51 del ET. Gracias también a una declaración de los empresarios, los ciudadanos pudieron saber en aquellos días que la patronal no estaba por el despido libre, que según ellos “no existe en ninguna parte de Europa”. Aclarando a continuación: “Lo único que se pide es que la adecuación de la plantilla a sus necesidades reales sea menos costosa”.

²¹⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “Guía secreta del pacto social”, *El País*, 23 de septiembre de 1984.

²¹⁹ Noticia, “Los contactos para el pacto social continuaron el pasado fin de semana”, *El País*, 24 de septiembre de 1984.

²²⁰ Portada, “Boyer suspende su viaje al FMI por dificultades en el acuerdo social”, *El País*, 25 de septiembre de 1984.

²²¹ Entre las quejas –todas ellas muy liberales– que se filtrarían a la prensa estaban las siguientes: «Así, en los contratos a tiempo parcial se establece que para convertir un contrato indefinido en parcial se precisa su negociación en convenio colectivo [...]. E incluso en los temporales, la limitación máxima de tres años en las actividades de nueva creación no les parece adecuada [...] Tampoco están de acuerdo con la fijación de una indemnización, aunque sea de 12 días, en la terminación de un contrato temporal». Precisamente todos y cada uno de los puntos de ‘defensa’ ideados por la Administración para evitar un abuso generalizado de los empleadores al respecto de estas figuras. Noticia, Rodolfo Serrano, “La patronal planteará la verdadera batalla del acuerdo social en la flexibilidad del mercado de trabajo”, *El País*, 25 de septiembre de 1984. Por lo demás, la contratación temporal –especialmente la de los programas de fomento de empleo– seguía estabilizada sin grandes variaciones en un contexto de destrucción de empleo. Pero lo anterior no era óbice para que se siguiera evidenciando la preferencia del empleador por tales formas contractuales. Noticia, “Disminuye el número de contratos de trabajo acogidos a programas de fomento del empleo”, *El País*, 24 de septiembre de 1984.

Si lo anterior entraba dentro de la lógica establecida, la segunda novedad que aportaba la información de Rodolfo Serrano evidenciaba la clara necesidad –sumada a una extendida debilidad política– del Gobierno, con el Equipo Económico en primera línea, de llegar a cualquier tipo de acuerdo. Almunia que, al menos, en lo simbólico antes que en lo estético había aparecido como una especie de contrapeso de cara al dúo Boyer-Solchaga, señalaría a través de los responsables de prensa del Ministerio de Trabajo lo siguiente al respecto de la propuesta patronal: “es un tema que queda en manos de sindicatos y patronal. Si ellos llegan a un acuerdo, por parte del Gobierno no hay ningún inconveniente en modificar la ley”. Una repentina predisposición pro-flexibilizadora ultra-liberal que aunque se podía haber intuido en anteriores ocasiones –al menos desde que se diera carta blanca a la entrada de tal propuesta en la agenda negociadora del futuro AES– iba alcanzar, en pocos días, prácticamente carta de naturaleza en medio de declaraciones, reuniones y pactos nunca del todo aclarados, incluso hasta el día de hoy.

Eso sí, en público, se negaría por activa y por pasiva que “el Gobierno no está dispuesto a ceder” a las pretensiones de la CEOE en materia de *despido libre*²²². Ello en las páginas de *El Socialista* en donde también se anunciaba las cuantiosas ventajas del AES frente al ANE –en otra a-histórica comparación– bajo el siguiente razonado argumento: “[El AES] se presenta como un nuevo ANE con la ventaja para los trabajadores de que será un Gobierno socialista quien lo ratifique y secunde, con lo que de hecho, da un mayor grado de confianza en su cumplimiento que el pasado ANE”²²³.

Mientras tanto, la UGT afrontaba la recta final interminable de la negociación, sufriendo una vez más. A la par que el Gobierno volvía a girar *a la derecha*, veía escapársele de las manos los *acuerdos de mínimos* tan largamente trabajados. La historia se volvía a repetir como *tragedia* antes que como *farsa*. Y ello con una constatación que se venía manejando desde la última reunión de la Ejecutiva: el Ejecutivo no estaba dispuesto a renunciar a introducir la Reforma de las Pensiones en los PGE para 1985. De la situación de *nerviosismo* se pasaría a la *alarma* en la reunión de la CEC del 25 de septiembre, tras todos “los contactos con la Administración” y su negativa a las peticiones ugetistas. Llegados aquí no se podía ceder ni un paso más. Al menos, en este terreno²²⁴. Lo que quedaba por dilucidar, entonces, era si UGT sería capaz de negarse a firmar el AES por tal cuestión, o finalmente cedería, conociendo tanto el estado de opinión de su CC como de parte de la clase trabajadora.

Un estado de la opinión pública que Comisiones Obreras sabría interpretar mejor en dicha ocasión, tras la reunión de su SC del martes 25. Como había anunciado, de forma previa, a través de una misiva de Camacho a González, se volvía a pedir que se retomara las negociaciones públicas. El posible acuerdo, “no solo se aleja sino que contradice el que debiera ser su principal objetivo, la creación de empleo”, se denunciaría en una contundente declaración. Más aún tras conocerse las “concesiones previas en materia fiscal y de déficit público a la patronal y la insistencia de esta en el despido libre y graves recortes a las pensiones y al conjunto de la Seguridad Social”. Ni los contenidos ni las formas convencían en absoluto, en tanto había conducido a una “confusión creada con reuniones excluyentes entre Gobierno, CEOE y UGT [que] desvirtúan la concertación social”. Así pues, no se renunciaba a seguir estando en la mesa pública, a pesar de que quedaba claro el nulo interés en convocarla. Y todo ello con un mensaje final que no tendría ningún eco: “CCOO propone a UGT la conjunción de esfuerzos para impedir la degradación del empleo y del mercado de trabajo que comportaría la modificación del Estatuto de los Trabajadores como reivindicación los empresarios”. Aquel sería el último comunicado antes de la firma del acuerdo, mientras que, por otro lado, Comisiones Obreras iniciaría una ardua tarea de información empresa por empresa, entre sus delegados y

²²² “La CEOE dificulta el acuerdo”, *El Socialista*, n° 367, (1984), p. 7.

²²³ “Cuatro años de concertación”, *El Socialista*, n° 367, (1984), p. 7.

²²⁴ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta n° 43. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 25 de septiembre de 1984”, sig. 002251-003.

sus afiliados. Llegado a aquí, lo que también quedaba claro, para tranquilidad de empresarios y Gobierno, y por descontando de UGT, es que CCOO no *se echaría al monte* en ningún caso, como anunciaría el propio Camacho. Sin duda una muy buena noticia para el “modelo español de concertación social”²²⁵.

12.2.4. La escenificación del cuarto y último «acto del drama» del AES (26 de septiembre-8 de octubre)

«El AES se ha firmado y, antes y después de la firma, desde muy importantes medios y por muy importantes personas, se llenó el país de notas exaltatorias. Surge aquí una primera sospecha al ciudadano que escucha tanto panegírico desde tan altas instancias, y sabe que cuando se va la mano en alabanzas es que, probablemente, escasean las virtudes del producto».

Editorial, “El AES, un pacto insolidario”, *Gaceta Sindical*²²⁶.

De la *necesidad y urgencia* que tenían aquel futurible acuerdo social, daría buena cuenta el presidente González en las mismas fechas. En otra clara muestra de respeto por las formas democráticas y los cauces constitucionales, Felipe González anunciaba un día antes de cumplirse el límite final dado a los negociadores, que los Presupuestos Generales no llegarían a tiempo al Congreso. Quedaba así en papel mojado el artículo 134.3 de la Constitución²²⁷.

Demasiados habían sido los esfuerzos, demasiadas las horas invertidas, para que al final en nada se quedarán tantas reuniones, tantas cesiones. “Sobre todo, porque a mi juicio, tiene una importancia de contenido y una importancia psicológica: da tranquilidad. Y la importancia psicológica de este año tal vez tenga incluso más valor que la importancia del contenido”, sentenciaría González en una rueda de prensa en Valencia el 25 de septiembre²²⁸. Lo estético teñido de psicológico triunfaba otra vez sobre la ética. No terminarían ahí las palabras del Presidente, para quien “la teoría del sacrificio salarial este año no es tan importante como otros en los que ha habido que hacer un ajuste”. Para rematar su argumento señalando lo siguiente: “El Gobierno está haciendo el máximo esfuerzo para que lo haya. Porque nos parece bueno para todos. Empezando, ¿por qué no confesarlo? por el Gobierno”.

El asunto del AES tomaría tanta trascendencia político-informativa que desde entonces hasta su firma *El País* titularía cada una de sus piezas informativas bajo el subtítulo: “Recta final del acuerdo socioeconómico”.

De repente y como si hubiera sucedido otro “gran milagro” similar al que aconteciera en noviembre de 1983, se pasaría del pesimismo y de la ruptura virtual, a un “avance sustantivo” en las larguísimas reuniones del fin de semana –del 21 al 23 de septiembre– que se prolongarían el lunes 24 y el martes 25, finalizando todas ellas a altas horas de la madrugada²²⁹. Lo anterior según *El País*, porque *ABC* negaba el *milagro* en directa y además no dejaba de

²²⁵ AHT, CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 25-IX-1984”, sig. 005-012, en donde se puede localizar el comunicado: “CCOO pide una reunión pública del AES antes del Consejo de Ministros”.

²²⁶ Editorial, “El AES, un pacto insolidario”, *Gaceta Sindical*, nº 32, (1984), p. 3.

²²⁷ «Artículo 134.3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». CE.

²²⁸ Portada, “Felipe González anuncia que el Gobierno presentará los Presupuestos de 1985, muy probablemente, fuera de plazo”, *El País*, 26 de septiembre de 1984.

²²⁹ Noticia, “El Gobierno presentará fuera de plazo los presupuestos al Congreso”, *El País*, 26 de septiembre de 1984.

hablar de un casi total pesimismo²³⁰. Por cierto, en esta última reunión citada se acordaría volver a aplazar, una vez más, la undécima reunión plenaria pública y oficial.

El *supuesto* avance –afirmado por *El País*– parecía especialmente relevante en los temas presupuestarios en donde ya se hablaba de cantidades concretas, aunque faltaba determinar las partidas específicas. La “luz de la esperanza” se encendería. En cualquier caso, en el instante en que se profundizaba en los detalles de la información, se observaba que quedaban no pocos importantes escollos por delante: primero, la cuestión del “despido libre”. Ya a partir de entonces se empezaría a hablar de una posible *fórmula de compromiso* que adquiriría contenido y especificidad propia en los días siguientes. En su versión primigenia, empero, más bien parecía un *chantaje* por parte de la patronal, en donde a cambio de renunciar a tal petición se le reducirían las cotizaciones a la Seguridad Social mucho más allá del 0,3 puntos ofrecidos en su día por el Gobierno²³¹. Pese a lo anterior, Rodolfo Serrano, citando en esta ocasión “fuentes cercanas al Gobierno” se planteaba como “técnicamente el acuerdo puede considerarse cerrado. Ahora sólo queda la voluntad política de las partes de firmarlo o no”.

El balance provisional resultaba claro: la CEOE ha vuelto a ganar *por goleada*, por el emplear el siempre útil símil futbolístico. El más significativo síntoma –a modo de esos necesarios pequeños detalles en los que fijarse– sería que el propio González hablaría de *derechos adquiridos* al referirse a las propuestas demandas por la CEOE. Una patronal que siempre recelosa de no firmar sin tener del todo claro si se podía o no arañar algo más, empezaría a desvelar la última parte de su estrategia. Una última fase de la *operación* largamente pensada y trabajada, y que daría óptimos resultados.

Primero, no aparecer al lado del Gobierno pero sobre todo de sus PGE en una especie de desvinculación *mediática y psicológica*. Y claro está, *política*. Aunque no sería sencilla de defender dicha estrategia dentro de la Junta Directiva de la CEOE, saldría adelante tal y como sucedería unos días más adelante. Pero lo cierto, es que sin que el acuerdo cerrado y menos firmado, el triunfo de la patronal era asumido por el propio *El País* el propio miércoles 26 de septiembre: “La CEOE, que ha conseguido, si no la totalidad, sí gran parte de sus reivindicaciones, está utilizando, según fuentes gubernamentales, la flexibilidad del mercado de trabajo para intensificar su presión en el acuerdo”²³².

La que no ganaría para *disgustos* sería la UGT en lo quedaba de semana de cara a finalizar el mes. Sin previo aviso desde el Ministerio de Trabajo –aunque casi por descontando con la presión del Equipo de Boyer– se introducía en la agenda negociadora, de nuevo, la reforma de la pensiones en su única vertiente conocida: la liberal²³³. Tema que había sido descartado, introducido y obviado en una sucesión de decisiones y contra-decisiones y que, en suma, había respondido a la necesidad de facilitar las negociaciones del AES y aliviar tensiones internas y externas la UGT.

En dichas circunstancias, a nivel de escenificación, la UGT optaría por cerrarse en banda. No le quedaba otra posibilidad política. La situación de tensión llegaría a ser tal que en

²³⁰ Noticia, Amancio Fernández, “Gobierno, CEOE y UGT fuerzan las últimas cesiones en la negociación del AES”, *ABC*, 26 de septiembre de 1984. Al menos desde *ABC* se hacía constar el comunicado del Secretariado Confederal de CCOO apuntado ya en la *nota* 225.

²³¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El cincopuntismo”, *El País*, 26 de septiembre de 1984.

²³² Noticia, Rodolfo Serrano, “Los puntos presupuestarios del AES quedaron técnicamente perfilados”, *El País*, 26 de septiembre de 1984.

²³³ «Trabajo planteó a CEOE y UGT un nuevo mecanismo para calcular la cuantía de las distintas pensiones, que reduce las percepciones iniciales de las futuras pensiones, pero garantizando, como contrapartida, la revaloración automática de las mismas en función del índice de precios al consumo. Se trataría de ampliar el período de cotización necesario para tener derecho a pensión y considerar también un periodo mayor para calcular su cuantía». Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno quiere introducir la reforma de pensiones en el texto del acuerdo, con la oposición de UGT”, *El País*, 27 de septiembre de 1984.

la noche del 26 de septiembre –cuando un día antes se había anunciado desde *El País* como el acuerdo estaba, prácticamente, cerrado– Redondo –escortado por Saracibar, Zufiaur y Corcuera– se entrevistarían en La Moncloa con González, “presumiblemente para tratar estos temas”, una vez anuladas todas y cada una de las “comisiones restringidas”. Aquella sería la primera muchas reuniones en los siguientes días en Presidencia de Gobierno.

Pero llegados aquí, ¿por qué el Gobierno volvía a introducir este tema tras un largo tiempo y justo cuando se estaba a punto de firmar? ¿Traición en el seno de la familia socialista? Lo único cierto es que se volvía a poner *contra la espada y la pared* a la central ugetista, quien sabía del amplio rechazo –interno pero también a nivel popular– que tal medida ocasionaría, aunque en realidad no cuestionaba sus contenidos de forma frontal. Además su situación interna –“UGT mantuvo fuertes debates internos” se señalaba en la crónica laboral de *El País* por aquellos mismos días– no era justamente la más adecuada para nuevas y más amplias batallas. A lo que había que sumar el desestabilizador *factor Corcuera*. Obligada a resituarse sin romper con el Gobierno, se conformaría en aquel entonces en que tal propuesta de reforma no apareciera por escrito en el AES. Un pobre como peligroso compromiso que podía volverse en contra en cualquier momento. De hecho, al final, no sería así ni en la forma ni en los contenidos, aunque se trataría de mantener las apariencias tras la fotografía oficiosa del magno acuerdo²³⁴.

Con un enorme cansancio acumulado por tantas largas noches de encuentros, la CEC de UGT se reuniría en la calle San Bernardo, nº 20 a las 16.00 hasta las 20.00h del viernes 28. Se iniciaba así la primera de las tres reuniones extraordinarias que se iban a mantener en los siguientes días –y de las que tenemos las correspondientes actas–. De esta forma, darían por validada la decisión adoptada por el Gobierno en la última reunión en el sentido de no incluir en los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto tampoco en el Acuerdo, lo relacionado con la Reforma de las Pensiones”, después de la última reunión con el señor Presidente. Solventando este nuevo bache, también se darían por cerrados los textos relativos al mercado de trabajo o las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otros puntos de primer orden²³⁵.

Pero no duró mucho el espíritu constructivo y pactista tras los últimos contactos. Vuelta, por tanto, al pesimismo generalizado para cerrar aquella semana. Ahí, de nuevo, reaparecería la habilidad innata de los técnicos de la CEOE para leer e interpretar la situación más favorable para introducir sus posiciones de fuerza. En plena crisis entre UGT y el Gobierno, la patronal no disimularía su estrategia en la reunión restringida del 27 de septiembre que terminaría avanzada la noche. La nueva apuesta de la patronal se dejaría bien clara a los presentes: sin tocar el tema de la autorización administrativa para los despidos colectivos no habría firma del AES, a lo que se le acompañaría de un repentino endurecimiento de su política de rentas.

También se conocería aquel día la contestación de González a Camacho, en esa siempre difícil como apasionada relación epistolar entre ambos. El Presidente se mostraba convencido de que no había otro camino que el adoptado, que, en suma, era el adecuado. No había otra política posible, aunque allí se deslizaba una frase que cobraría un gran significado en los días siguientes y que se pasaría por alto tanto en la prensa así como desde determinados sectores sindicales: al referirse a las vías para la creación de empleo, se hablaba de la necesaria “adaptación a sistemas europeos de las normas de funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y el comportamiento moderador de las rentas salariales”²³⁶.

²³⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno quiere introducir la reforma de pensiones en el texto del acuerdo, con la oposición de UGT”, *El País*, 27 de septiembre de 1984.

²³⁵ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 44. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 28 de septiembre de 1984”, sig. 002251-003.

²³⁶ Noticia, Rodolfo Serrano, “La patronal CEOE endurece para obtener mayores contrapartidas en el Acuerdo Económico y Social”, *El País*, 28 de septiembre de 1984.

Pero inclusive la paciencia gubernamental, puesta a prueba en numerosas ocasiones, tenía un límite. El 28 de septiembre, viernes, anunciaba que a las 12.00h del sábado 29 de septiembre se terminaba el plazo para que la CEOE contestara afirmativamente o no sobre lo acordado hasta entonces en el AES. Joaquín Almunia en una inusual dureza –una vez que había sustituido a Miguel Boyer en tales labores– diría basta: no habría más reuniones y tampoco se cedería más a las propuestas patronales, aunque, admitiendo al mismo, tiempo como “una política económica es más efectiva según esté o no apoyada por los agentes sociales. Y, en este caso, el acuerdo significaba poder aplicar una política presupuestaria con más facilidad”. ¿Sería verdad en aquella ocasión? Lo cierto es que parecía que desde el Ejecutivo se iba en serio, aunque visto los sucesos aplazamientos de fechas límites la misma seriedad gubernamental había ido perdiendo enteros.

Oído el mensaje, el viernes 28 se celebraría una nueva reunión restringida. Y lo que volvía a pasar era de sobra conocido. La CEOE volvía a recolectar no pocos éxitos: fijación de la banda salarial entre el 5,5% al 7,5% –sobre la previsión del 7% de IPC para 1985 y con intervención directa de Almunia al respecto– con revisión anual, pero sin clausula de revisión; y eliminación de la propuesta del Gobierno de imponer un máximo límite de 100.000 pesetas a las desgravaciones por inversión en el IRPF –aspecto este totalmente liberalizado con el posterior “Decreto Boyer”²³⁷. Además en la misma reunión quedarían perfiladas y prácticamente cerradas la mayor parte de las cuestiones presupuestarias: 100.000 millones destinados a la inversión pública que suponían otros cuarenta mil sobre los sesenta mil inicialmente proyectados; 60.000 al denominado fondo especial de inversiones financiado de forma tripartida, con una aportación de los trabajadores del 0,3% y que se descontaría de sus nóminas. Un fondo al que también contribuirían *solidariamente* los funcionarios con una rebaja del 0,25% de su salario; 30.000 millones para la creación de contratos vía conciertos institucionales; reducción de las cotizaciones sociales en los contratos de formación profesional más un 10% de las tarifas de primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y garantías de mantener el poder adquisitivo de las pensiones²³⁸.

Llegados a esa situación hasta la CEOE afirmaría como no tenía sentido seguir reuniéndose. Ahora bien, frente al Consejo de Ministros de carácter extraordinario a celebrarse, en primear instancia, el sábado 28, necesitaba ganar tiempo, y no aparecer vinculada a los Presupuestos Generales. Posponer o alargar la final decisión era una estrategia que había empleado en todas y cada una de las ocasiones por diferentes motivos, pero que en dichas circunstancias tenían una clara lógica. “No [son] nuestros [PGE]” afirmaría Juan Jiménez Aguilar sabedor que dentro del cúpula general de la CEOE no se vería con buenos ojos firmar un acuerdo –que se calculaba entonces que estaría redactado entre el martes 2 o el miércoles 3– que pudiera llegar a leerse en términos políticos. Asimismo, conocedores también de que UGT se había mostrado de acuerdo con las propuestas de incidencia presupuestaria, mostrarían su rechazo a la segunda propuesta de “fórmula de compromiso” en relación a su planteamiento de eliminar la autorización administrativa en caso de despidos colectivos: “crear una comisión mixta que elaborara un estudio sobre el tema comprometiéndose el Gobierno a incluir en un proyecto de ley de los resultados”. Una cosa es que no se fieran de las intenciones del Gobierno, pero aquella *fórmula de compromiso* iba un paso más allá de lo hasta entonces acordado. A todo lo anterior, asimismo, se añadían las interminables peticiones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social²³⁹.

²³⁷ Portada, “La CEOE y UGT acuerdan subidas salariales entre el 5,5% y el 7,5% para 1985”, *El País*, 29 de septiembre de 1984. Sobre el ‘decreto Boyer’ véase el apartado “7.1.1. El trienio reformista (1982-1985)”.

²³⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “La propuesta para un pacto”, *El País*, 29 de septiembre de 1984.

²³⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno da por finalizadas las negociaciones si la CEOE no contesta hoy afirmativamente al pacto social”, *El País*, 29 de septiembre de 1984.

Por si todo lo anterior fuera poco, a la Ejecutiva de UGT se le sumaría otro muy grave problema, que ya no se podía ocultar en medio de no pocas desconfianzas y recelos. Nos referimos al *factor Corcuera*. Por primera vez, desde el XXXIII Congreso ugetista se tendría que votar dentro de la CEC una propuesta de negociación. Más tarde se sabrían los porqués –entre ellos el intento de Corcuera de cerrar el acuerdo lo antes posible, aunque conllevara aceptar las propuestas de máximos la patronal ante las presiones del Ejecutivo–. Mientras tanto, se trataría de guardar y conservar la máxima disciplina interna a nivel público. Sucedería tal acontecimiento en una reunión extraordinaria de la CEC convocada el sábado a las 16.00h. El motivo: la posición de la CEOE de endurecer a ultranza su posición con respecto al mercado de trabajo y las cotizaciones. Tras estudiar el texto alternativo de la propia CEOE, y proponerse varias salidas –dar por válidas o no las propuestas de la patronal–, se “acordó con un voto en contra y una abstención, rechazar el texto dado por la CEOE y mantener la redacción elaborada por el propio Gobierno ya aprobada en la reunión extraordinaria de ayer por esta CEC”²⁴⁰.

Por lo demás, nuevamente, el ultimátum del Gobierno se quedaría en *papel mojado* por más que la credibilidad institucional, pudiera verse seriamente mermada ante la política chantajista de la patronal. Cuando parecían que no habría más encuentros, se volvería a reunir con energías redobladas en otra larga serie de sesiones continuadas, durante un nuevo dramático fin de semana negociador entre 28, 29 y 30 de septiembre. Superándose a sí misma la CEOE sería capaz de firmar por la madrugada del sábado 29 al domingo 30 un comunicado conjunto –“confuso” en palabras de Rodolfo Serrano– con la UGT y el Gobierno hablando de una “solución de compromiso” y al mismo tiempo negar la existencia de un “preacuerdo consensuado entre las partes”. Ello a pesar de que el citado comunicado se planteara como “los puntos relacionados con los Presupuestos Generales del Estado, en los que existían graves discrepancias en este período de negociación, se han superado los problemas de fondo”²⁴¹. Llegados aquí, ¿cedería el Gobierno a las presiones de la CEOE de cara a no firmar el acuerdo antes de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado? No era descartable.

Después de un fin de semana agotador y con escasas horas de sueño, la CEC de UGT se volvía a reunir el lunes 1 de octubre a las 10.00h –por cierto, sería la última reunión hasta un mes después en noviembre, según el libro de actas–. Allí se informaría de cómo no había sido posible de ninguna forma “conseguir” que la CEOE aceptara “el texto elaborado por el Gobierno y asumido por nosotros referente al Mercado de Trabajo”. Bloqueada la negociación, se justificaría la redacción confusa del comunicado *de consenso*. Tras una hora y media se cerraría el encuentro, sin mayores acuerdos²⁴².

Pospuesto el decisivo Consejo de Ministros extraordinario para el día siguiente y convocada una nueva reunión –por más que se prometiera que no habría ninguna nueva cita ya fuera pública, privada o secreta, oficial o no oficial...– se sabría “según fuentes solventes” que para desatascar de forma definitiva el embrollo habría participado directamente Felipe

²⁴⁰ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 45. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 29 de septiembre de 1984”, sig. 002251-003. Tiempo después se sabría la tensión vivida en aquella reunión gracias, entre otros, a Ricardo Martín: «La consecuencia del fiasco se vivió como un drama en la Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, cuyos miembros se vieron obligados a votar, algo inusual desde los tiempos de los conflictos internos entre históricos y ‘cristianos’». MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, op.cit., p. 129.

²⁴¹ Portada, “Una solución de compromiso permite seguir negociando el pacto social”, *El País*, 30 de septiembre de 1984. El texto completo del comunicado *confuso* era el siguiente: «Sin que en estos momentos pueda hacerse un pronunciamiento sobre la valoración global de un posible acuerdo, sí puede decirse que sobre los puntos relacionados [...], lo que permite avanzar en la negociación del resto de los contenidos que deben configurar el acuerdo global, sobre el que se pronunciará, una vez concluida la negociación, los órganos de dirección de las organizaciones presentes. En consecuencia se propone continuar el próximo lunes».

²⁴² AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 46. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 1 de octubre de 1984”, sig. 002251-003.

González. Dicho y hecho. Aunque días más tarde se conocería una primera como parcial versión de cómo se había llegado a la “fórmula de compromiso”, en donde jugarían un papel clave inesperados actores políticos-económicos en otra clara muestra de los intereses creados alrededor del AES; también se sabría como en aquellos mismos días el Gobierno había hecho una nueva concesión a la patronal: pasar del 0,3 puntos a 0,6 puntos la reducción de la cotizaciones a la Seguridad Social. Otro paso para adelante de la patronal, que la UGT trataría de minimizar o directamente ocultar en adelante.

Reunido en continuadas sesiones extraordinarias el Consejo de Ministros, en paralelo también a las sesiones continuas de las negociaciones del AES, finalmente aprobaría los Presupuestos para 1985 el domingo 30 de septiembre²⁴³. Aquellos serían unos presupuestos continuistas marcados por la obsesión contra el recorte del déficit público, que conllevarían la reducción de 300.000 millones de gasto, más allá de las “nuevas” partidas sociales ligadas al AES –en total 150.000 millones de pesetas–.

En una reunión de Consejo de Ministros un tanto singular tanto por el día en que se celebraría como por la ausencia de la posterior rueda de prensa, en tanto el principal responsable al respecto, Eduardo Sotillos, decidiera no convocarla²⁴⁴. Prácticamente convertido Almunia en el portavoz del Gobierno *de facto* dejaría caer a la *prensa* a su finalización que, por un lado, no existía acuerdo alguno para facilitar a través de las enmiendas parlamentarias la posible posterior modificación de los presupuestos, y, por otro, lo contrario. En cualquier caso, con o sin acuerdo, con o sin AES, uno de los posibles obstáculos para la firma del acuerdo social, las cotizaciones a la Seguridad Social, no dependía de los presupuestos sino del correspondiente decreto del Ministerio de Trabajo. No obstante, otra lectura política quedaba clara: la CEOE había vuelto a ganar en su batalla en no verse asimilada a los Presupuestos Generales del Gobierno socialista²⁴⁵. Un acontecimiento celebrado por *ABC* en su editorial del lunes 1 de octubre²⁴⁶.

²⁴³ Ley 50/1984, de 30 de diciembre, *de Presupuestos Generales del Estado para 1985*. Por lo demás, nos remitimos a lo apuntado en el Capítulo 7, *nota* 78.

²⁴⁴ Una anómala situación que se criticaría duramente desde un editorial de *El País*: «Aunque los ministros dedicaran un día festivo para celebrar esa sesión extraordinaria, los funcionarios que tienen encomendada –al menos teóricamente– la tarea de informar a los medios de comunicación y a la sociedad entera de las actuaciones del poder ejecutivo optaron por santificar la fiesta, cerrar el tenderete, despachar una lacónica nota y endosar a los titulares de los carteras respectivas el trabajo del portavoz del Gobierno». Con la crítica por delante por la falta de respecto a la legalidad vigente, continuaba su dura crítica con los siguientes comentarios: «Resulta del todo incomprensible, por lo pronto, que el Gobierno se haya refugiado en un silencio vergonzante y no haya expuesto las razones que pudieran disculpar –aunque nunca justificar– la aparatosa desviación del ordenamiento jurídico que significa la demora del poder ejecutivo en el envío al Congreso de una ley tan básica para el funcionamiento del Estado como son los presupuestos generales». Editorial, “El presupuesto tarde y en domingo”, *El País*, 1 de octubre de 1984.

²⁴⁵ Portada, “Los presupuestos tardarán todavía una semana en llegar a las Cortes”, *El País*, 1 de octubre de 1984; Noticia, “El Gobierno se reserva la comunicación de los Presupuestos con enmiendas parlamentarias, para facilitar el AES”, *El País*, 1 de octubre de 1984.

²⁴⁶ «En el pulso que mantiene la Confederación Española de Organizaciones Empresariales con el Gobierno socialista y con su sindicato, ha logrado algo del mayor interés para el claro entendimiento del problema. Queda claro que unos Presupuestos no pactados o consensuados por el Gobierno, responsabilidad específica del Gobierno son». Tras esta glosa en el primer párrafo en el citado editorial, venía una segunda de mayor tamaño si cabe: «Y cuanto a la CEOE se refiere, queda de manifiesto su decidida voluntad de cooperar en un acuerdo y también el rechazo que han sufrido sus razonables propuestas de reducción del gasto público y liberalización de las relaciones laborales». Precisamente sobre este punto animaría a la patronal a dar la última gran batalla: «Quisiéramos, finalmente, señalar en este comentario la trascendental importancia de una de las materias en la que no se ha logrado hasta ahora la aproximación de los respectivos puntos de partida. Nos referimos a la previsible continuidad de unas condiciones, en materia de contratación laboral, gravemente disímiles con las imperantes en ese Mercado Común [...]. En este punto se encuentra definido lo esencial del modelo concurrencia de la empresa

Siendo la CEOE una organización vertical y presidencialista en aquellos días pasaría – de forma temporal– por un acentuado síndrome de asamblearismo, pues no dejaría de convocar sucesivamente tanto su Junta Directiva como su Comité Ejecutivo. En concreto, para los días 2 y 3 de cara a decidir se firmaba o no se firmaba el AES. De hecho, y según se filtraría convenientemente a la prensa había *sectores radicales* que preferían todavía no firmar un acuerdo de tal tipo, para no ligarse a la “política económica dirigida por Miguel Boyer”. No sería por la falta de nuevas cesiones. El Gobierno decidiría unilateralmente en la reunión en donde se concretaría la más que extraña “fórmula de compromiso”, excluir a UGT con respecto al tema de las cotizaciones sociales, y que como hemos analizado ni siquiera se discutiría en la reunión de la CEC del día 1 de octubre. Todavía más, pues a pesar de que comprendía y casi daba por válidas las pretensiones de reducir 1,5 puntos de la cotizaciones de la Seguridad Social propuesta por la patronal –hasta entonces rebajadas en 0,6 puntos aunque por otro lado se obligará a abonar 0,3 untos por las cotizaciones para el Fondo de Solidaridad– no podía ceder más por cuestiones estrictamente económicas. Así pues, tan sólo quedaba por resolverse si el Gobierno transigiría o no con la exigencia de la CEOE de que se comprometiera por escrito y formalmente a su petición de vaciar de contenido el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores²⁴⁷. El drama y la confusión continuarían hasta el último momento. Tocaba, pues, esperar a la probada “buena voluntad” de los empresarios españoles.

Pero la información laboral de lo que sucedería aquel decisivo lunes 1 de octubre dejaba otros dos datos realmente relevantes. Primero, en relación a la enésima reunión secreta entre Gobierno, CEOE y UGT celebrada el propio lunes. En su ya asentada predisposición para interpretar la realidad al calor de sus intereses, desde el Ministerio de Trabajo se contestaría a la petición de Comisiones Obreras de participar en la reunión prevista tal día, al sospechar que se iba a tratar el tema del despido libre, con un sintético pero clarificador mensaje: “[L]a reunión a la que hacen mención en su télex ha finalizado ya. Y en ella no se ha tratado sobre el despido libre”. Una contestación del todo diplomática.

También se conocería aquel *movido* lunes, como en la reunión en donde se decidiera la citadas varias veces “fórmula de compromiso” la intervención de Luis Solana –miembro del Comité Federal del PSOE y Presidente de Telefónica– había sido clave, al expresar el deseo de Felipe González de avanzar dejando abierta la posibilidad de hablar sobre la propuesta patronal de despido libre²⁴⁸. Una intervención repleta de sombras y de dobles jugadas como se evidenciaría en los siguientes meses.

Las *sospechas* en torno a la cesión definitiva a la patronal por parte del Gobierno al respecto, no dejarían de aumentar en los días siguientes en un ambiente de suma de debilidades por parte del Ejecutivo y de la propia UGT. Entre la destitución fulminante de Enrique Moya, los problemas internos al respecto de la OTAN, a lo que se sumaba también en política internacional las negociaciones de la CEE, vendrían a añadirse el incremento de la espiral conflictiva por la reconversión naval, con otra nota cuando menos singular de lo que fue y significó 1984 en tal campo: la primera huelga de la historia de los inspectores de Hacienda²⁴⁹.

española en el palenque del mercado comunitario». Editorial, “Cuestiones claras”, *ABC*, 1 de octubre de 1984.

²⁴⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “La firma del pacto social, pendiente de la decisión política de la patronal”, *El País*, 1 de octubre de 1984.

²⁴⁸ Noticia, Rodolfo Serrano, “El pacto social no tendrá eficacia general sin la firma de CCOO”, *El País*, 2 de octubre de 1984.

²⁴⁹ En sendos virulentos editoriales por parte de *ABC* el miércoles 3 de octubre, no se dudaba en apoyar sin disimulos la huelga de los funcionarios de Hacienda: «En estas circunstancias, aun sir ser partidarios del recurso generalizado a la huelga [...] comprendemos las razones que impulsan a los inspectores a realizarla». Tras tan sorprendente anuncio, el segundo editorial del día estaba dedicada a la destitución de Enrique Moya. Leída de forma casi exclusiva en términos de lucha interna dentro del socialismo –con una aparente victoria de Alfonso Guerra, según *ABC*– tras la ‘no’ crisis ministerial del verano, en donde al parecer la intervención de UGT casi llegaría a poner en peligro la continuidad de

Vistas así las cosas, ¿cuánto tardaría en ceder, otra vez, el Ejecutivo? O acaso, ¿resistiría a pesar del riesgo de un posible *non nato AES*?

Por más que se tratarán de negociadores profesionales, las filtraciones interesadas o no a la prensa estaban a la orden del día. Si Rodolfo Serrano daba por hecho el martes 2 de octubre –en base a una filtración del día anterior– que la persona clave en evitar la ruptura de las negociaciones a finales de septiembre había sido Luis Solana, *Diario 16* lo confirmaría también aquel mismo días. Ratificadas dichas informaciones por “fuentes de la patronal” quedaba claro que el Gobierno había cedido, casi de forma plena, en lo que respectaba a las propuestas de la CEOE, a la par que lo había ocultado convenientemente a los compañeros sindicalistas hermanos:

«Felipe González, prometió a la CEOE que, si firmaba el pacto social se modificaría la legislación laboral española, de manera que no sería necesaria la autorización administrativa para las empresas de menos de 25 trabajadores pudieran proceder al despido colectivo por causas tecnológicas o de fuerza mayor».

La radical y frontal oposición de UGT ante tal propósito estaría, pues, detrás de la redacción del “confuso” comunicado de la madrugada del anterior sábado. Todavía se sabría más por la prensa: sería personalmente Luis Solana quien les haría llegar tal comunicación presidencial a los interesados. A saber, a la patronal.

Por otro lado, y gracias al testimonio de José María Zufiaur, se puede saber cómo se desarrolló toda esa operación y en donde, otra vez, se haría presente el *factor Corcuera*:

«[Tras] una enganchada muy fuerte con Joaquín Almunia por el tema de la aplicación de la contratación laboral. Hubo una entrevista con Felipe González sobre el despido. Nos dijo que le diéramos un papel con la posición límite que estábamos dispuestos a admitir para no romper. Dijo que con ese papel en la mano estaba dispuesto a ‘crujir’ a los de la CEOE. Pocos días después, el partido mandó a un delegación del Comité Federal formada por Luis Solana y José Luis Corcuera a entrevistarse con José María Cuevas, y allí se modificó radicalmente el papel que le habíamos entregado a Felipe, con el que supuestamente ‘les iba a crujir’»²⁵⁰.

Puntualizados estos datos que no se conocieron hasta muchos años después, la noticia *filtrada* en aquel momento llegaba en un momento extremadamente muy delicado, y en donde la pregunta del motivo o motivos que impulsaría a filtrar tal noticia, no debería pasar desapercibida al igual que en otras tantas ocasiones. La respuesta aquí parece lógica: la

Boyer. Puestos a las sospechas e hipótesis inverosímiles se veía la *mano oculta* del sindicato socialista que buscaba dar un *giro* a la política económica del Gobierno: «Si lo ocurrido correspondiera a esto último [victoria estratégica de Guerra sobre el Equipo Económico] el relevo de Moya implicaría que la crisis de Gobierno había comenzado a sustanciarse con una derrota de todo lo que políticamente significa el actual ministro de Economía y Hacienda. Pero si el relevo del INI obedece en su sentido a una práctica compensatoria del presidente González, resultaría que se le daba con esto a Guerra y a la UGT un lenitivo político con el que aliviar los efectos de una derrota en otros ámbitos, más importantes por más amplios que los representados por la empresa pública. Convendría no perder de vista el tramo final de la negociación del AES como telón de fondo de esta decisión del presidente, aparentemente ambigua y posiblemente salomónica». Editorial, “Inspectores de Hacienda”; Editorial, “Sentido de una destitución”, ambos publicados en *ABC*, 3 de octubre de 1984.

²⁵⁰ Declaraciones de José María Zufiaur a, MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, *op.cit.*, pp. 128-129. En otra entrevista hablaría en los siguientes términos: «Yo recuerdo haber tenido alguna discusión muy fuerte con Corcuera con el tema del AES: ‘nos estás negociando, estás simplemente escenificando’». Declaraciones a, CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, *op.cit.*, p. 187. Véase aquí también su valiosa aportación para entender, desde una perspectiva global, la estrategia que seguiría la UGT al respecto de la concertación social desde finales de los setenta hasta la firma del AES: ZUFIAUR, José M^a, “El sindicalismo español...”, *op.cit.*, pp. 203-234. Por último, consúltese el muy interesante trabajo de, RUBIO CASTRO, Ana M^a, “El neocorporativismo español: El Acuerdo Económico y Social (1985-1986)”, *Revista de Estudios Políticos*, n^o 50, (1986), pp. 213-140. Véase también aquí: SAGARDOY, Juan Antonio, “Apuntes breves sobre el Acuerdo Económico y Social”, *Papeles de Economía Española*, n^o 21, (1984), pp. 236-241.

filtración se produciría desde la patronal para presionar en la recta final del AES, sin que hubiera tiempo para mayores como posibles ratificaciones en adelante. Pues, justamente, tanto durante el lunes como el martes de aquella semana la CEOE como UGT y el Gobierno se encontrarían reunidos de forma casi permanente para redactar el texto²⁵¹.

Comisiones Obreras, quien como todo buen ciudadano o ciudadana venía enterándose de lo que sucedía, de forma principal, por los medios de comunicación, y una vez decidida democráticamente su expulsión de la sesión plenaria; reuniría a su Consejo Confederal los días 2 y 3 de octubre. Dicho encuentro iba a resultar clave tanto por lo que se aprobaría –así como por el *porcentaje* obtenido en cierta votación– como por estrategia a corto-medio plazo allí diseñada. Resulta también este caso oportuno destacar que el acta resultante de dos días de reunión presenta un extraordinario formato reducido.

Camacho abriría el encuentro con un largo discurso. “Nos reunimos hoy por primera vez como Consejo Confederal, que acaba de ser elegido. Por eso y ante la negociación AES, el Secretariado y la CE debieron actuar”. Dicho esto, el Secretario General de la C.S. de Comisiones Obreras tenía claro quien había sido el gran vencedor de todo el proceso del AES:

«La gran patronal ha conseguido casi todo del Gobierno. Reducción de salarios, aumento excedentes capital, contratación temporal generalizada [...], flexibilización máxima de plantillas, después de haber conseguido reducción intereses para grandes empresas. Y piden incluso despido libre para los fijos, suprimiendo el artículo 51 del E[statuto] Trabajador, y prepara el próximo ataque a la Seguridad Social; pero va más allá, juego a la confrontación electoral del 86 y toma posición más clara en la línea de los medios financieros. Se sirvió del PSOE como ariete contra los trabajadores, ahora no le necesita tanto, y juega duro. El ultimátum del Gobierno; la CEOE se burla. Le contesta 2 horas después, previa intervención de Felipe».

Los datos, además, parecían no dejar dudas: “La Patronal consigue reducir 0,6 puntos pagos S. Social”. Pero no estaba ahí lo más preocupante, pues se continuaba en una “situación de emergencia en lo económico-social”. Y ahí aparecía la llamada operación de *preparación del AES*, mediante una “presión psicológica brutal”, con la ayuda de los medios, y que había seguido tres fases. Declaraciones y más declaraciones, datos y más datos, conducían a la misma conclusión: se estaba en una gran operación para avalar la política económica del Gobierno. Y ahí aparecía la actitud opositora de CCOO, que había conducido a que se negociara “de noche y en secreto porque no pueden hacerlo de día y con taquígrafos”. Se denunciaría así por ejemplo, la reunión-cena del 5 de septiembre entre Trabajo y UGT como uno de los mejores ejemplos, pero sobre todo exacerbaría las negativas de Almunia a reconocer todo el *juego* de reuniones secretas. Pero ante todo Camacho se mostraría “indignado” con la UGT, quien había actuado de forma “irresponsable” y pretendía volver a poner en marcha la estrategia del AMI, consistente en “aislarnos”.

Pero lo que no podía hacer ni la CEOE, ni la UGT pero sobre todo el Gobierno era invisibilizar las movilizaciones habidas. Y claro está ante el objetivo del Ejecutivo de que “avalemos su política económica y sus parados” no se pensaba transigir. La situación, por tanto, era “excepcional”. “Nuestros adversarios, observarán este Consejo Confederal y sus decisiones con lupa”, concluía tras recordar los puntos defendidos por CCOO²⁵². Y así fue.

El *informe de Gestión* presentado por Camacho, tras una larga discusión, obtendría 133 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones. Un resultado que, en breve se trataría de manipular burdamente, así como el dado en relación a la resolución sobre el AES allí aprobada, por 115 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones. Una *resolución* que para empezar aprobaba hacer una “consulta de todas las organizaciones, delegados y Comités de Empresas”, y cuyo resultado sería la “base determinante del pronunciamiento definitivo de la C.S. de

²⁵¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “CEOE confirma que el presidente del Gobierno prometió más facilidades de despido”, *El País*, 3 de octubre de 1984.

²⁵² AHT, CCOO-CC, “Informe de la C.E. al Consejo Confederal, presentado por Marcelino Camacho. 2 de octubre de 1984”, sig. 2-15.

CCOO”. Asimismo se procedería a trasladar un conjunto de valoraciones y orientaciones desde el Consejo Confederal a las diferentes asambleas para las discusiones y votaciones.

A lo largo de los ocho folios de aquella resolución –a modo de guión programático– se repasarían todas las cifras y datos manejados en el AES. De esta forma, uno a uno, se iría dando una versión totalmente contraria de lo que los medios de comunicación y los interlocutores sociales habían venido ofreciendo, cuando así lo habían estimado oportuno. Por ejemplo se destacaría en la citada resolución, como los puntos de acuerdo del AES “incluyen para la discusión nuevas modificaciones exigidas por la patronal, que apuntan abiertamente al despido, libre y prácticamente gratuito, y que el Gobierno para hacerse comprometido a concedérselo”; así se hacía constar como la banda salarial “comprendida entre el 5,5% al 7,5%”, junto con la ausencia de cláusula de revisión salarial, supondrían un nuevo paso hacia atrás en la pérdida de poder adquisitivo. Repasado también la forma y el método negociador, se anunciaba como “Comisiones Obreras rechaza las previsiones del Gobierno, entre otras razones, porque además de especulativas, sirven de guía para imponer nuevos ajustes que merman el salario de los trabajadores”. Y así establecía como de cara a mantener el poder adquisitivo la subida salarial “debe ser del orden del 8,75”. Para concluir como la “consecución de todos los objetivos antes mencionados, requieren de un esfuerzo de movilización de todos los trabajadores, lo más amplia y unitaria posible”, así como con el fin de ir “creando las condiciones necesarias” destinadas a ir a una “jornada nacional de lucha”. Tampoco en aquella reunión saldría a relucir la palabra “huelga” o “paro” general²⁵³.

Mientras que la prensa se centraría casi de forma exclusiva en el rechazo de CCOO al AES obviando otras tantas cuestiones relevantes acontecidas en tal reunión del CS²⁵⁴, por su parte el Gabinete Técnico Confederal empezaría a preparar los correspondientes informes de cara plantar batalla jurídica del AES. Unos informes que avisaban como en consonancia con la lectura del Título Tercero del Estatuto de los Trabajadores relativo a la negociación colectiva, el AES no tendría “entidad jurídica y será de eficacia limitada” si no firmaba Comisiones Obreras. Un hecho que ya se daría con la firma del AMI. Se iniciaban los preparativos, pues, el duro y largo enfrentamiento para el día después de la firma del AES. Previstas para el propio desarrollo del AES un conjunto de Comisiones Mixtas en los casos en que se tratarán aspectos de carácter interconfederal, en las mismas tendría que estar Comisiones Obreras –sumado en su caso lo que decidiera en su caso la INTG o ELA-STV, respectivamente– como un miembro más por los anteriores argumentos expuestos. Así sin firmarse ni siquiera el acuerdo social se añadía otro nuevo problema de muy difícil resolución.

Pero ya de vuelta al último tramo de las conspiraciones e intrigas finales del AES, la comentada filtración de principios de la semana sobre el papel jugado por Luis Solana tendría a no más tardar sus consecuencias. No podía ser de otra manera. Así pues, la mesa restringida pseudo-oficial volvería a bloquearse el miércoles tres. Sí, justo el día en que se esperaba tener redactado el texto definitivo. La representación político-teatral llegaría a su cenit dramático. “Al borde la ruptura” calificaría Rodolfo Serrano la situación en la que había quedado el pacto social. Tan grave estaba la situación que desde la CEIM se advertiría como en caso de no transigirse con la “fórmula de compromiso” de marras propuesta por la patronal y que se negaba a firmar UGT, el AES quedaría en un simple AI’85. Sabedores de su posición de fuerza Juan Jiménez Aguilar todavía llegaría a declarar aquel mismo miércoles: “lo único que hemos conseguido en estas negociaciones es no perder cosas, que nos dejasen como estábamos”²⁵⁵.

²⁵³ AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión del Consejo Confederal de los días 2/3-X-1983”, sig. 2-15, en donde se adjunta: “Resolución del Consejo Confederal de CCOO”, del día 3 de octubre.

²⁵⁴ Noticia, “El Consejo Confederal de CCOO rechaza la firma del Acuerdo Económico y Social”, *El País*, 3 de octubre de 1984.

²⁵⁵ Portada, “La libertad de despido bloquea la firma del pacto social”, *El País*, 4 de octubre de 1984; Noticia, Rodolfo Serrano, “La exigencia de la CEOE de una mayor facilidad de despido coloca el acuerdo social al borde de la ruptura”, *El País*, 4 de octubre de 1984.

Pero ante todo la noticia de *Diario 16* tendría muy serias hondas repercusiones a corto y medio plazo en el seno de UGT. La sola idea de que el AES corriera peligro de no firmarse, podría llegar a provocar una auténtica batalla interna²⁵⁶. De lo anterior, se haría eco el mismo Rodolfo Serrano, al afirmar como en un cada vez más dividido sindicato, se estaba llegando a perder por instantes su tradicional interna. Y ahí aparecía, precisamente, el que, a buen seguro, sea uno de los principales elementos explicativos de todo lo anterior: el *factor Corcuera*, que inclusive empezaba a hacer mella dentro de la comisión negociadora de la UGT. Negadas tal posibilidad, al igual que negadas habían sido las reuniones secretas y/o las “comisiones restringidas”, quedaban claros cuales eran los principales motivos de tensión interna. Primero, “el excesivo sigilo con el que los negociadores han llevado las conversaciones, hasta el extremo de que destacados miembros de la dirección del sindicato hayan tenido que recurrir a los medios de comunicación para conocer el estado de las negociaciones”. Y, en segundo término, las cesiones de la UGT en casi todas las materias, a lo que se sumaba el espinoso asunto de la flexibilidad laboral. La situación estaba tan complicada que Justo Fernández –principal referencia crítica de la UGT y hombre fuerte de la poderosa Federación de Banca– en unas inusuales declaraciones –vía comunicado– hablaría de “auténtico fracaso, dándose la impresión de un constante entreguismo en cada uno de los obstáculos puestos por el Gobierno o la propia CEOE”. Su balance final tampoco se quedaba corto: UGT “parecía dispuesta a todo, con tal de firmar el acuerdo”.

La situación, de hecho, estaba llegando a tales niveles que también se filtraría a la prensa que desde el “más alto nivel de UGT” se tenían “serias dudas sobre los resultados de la consulta al comité confederal” prevista para el 6 de octubre. Lo anterior constituía una importante novedad, en términos históricos²⁵⁷.

Llegados aquí, en la tarde-noche del 4 de octubre de 1984 tendría lugar otro de esos pequeños-grandes “milagros” que parecían estar de cada uno de los acuerdos sociales, de cada uno de los acuerdos interconfederales..., aunque visto cómo había transcurrido la larga negociación del AES en la citada ocasión el *milagro* fuera digno de considerar. Más tarde se sabría –como en todos y cada uno de los anteriores pactos sociales– que todo había sido más banal, hasta el punto de resultar especialmente inquietante que un acuerdo de tal tamaño se decidiera de forma un tanto “alegre”, a pesar de que el mismo pudiera llegar a afectar a millones de trabajadores en los siguientes años.

Carente el AES de la *épica narrativa* que acompañaría el durante y el después de los *Pactos de la Moncloa*, tocaba hacerlo cuando menos presentable con el fin de evitar una auténtica sangría dentro de la familia socialista. Especialmente, se hablaría de que no había ni *vencedores* ni *vencidos* –por más que el AES no dejará de ser un capítulo central en el proceso de recomposición de posiciones en las relaciones capital-trabajo– lo que por sí evidenciaba la dura batalla habida. Lo que estaba fuera de dudas es que se había extendido la sensación dentro y fuera de las “comisiones restringidas” de que la CEOE había superado con nota –una vez más– su último chantaje.

En la primer parte del AES, la del acuerdo tripartito, en el Capítulo VII, artículo 17, titulado “Legislación Laboral”, se diría literalmente lo siguiente:

«El Gobierno manifiesta su voluntad de adaptar y armonizar la legislación interna española, en materia laboral, al acervo comunitario, del que forma parte la Directiva de 17 de febrero de 1975, y a las normas habituales de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea en esta materia.

²⁵⁶ Portada, “La libertad de despido bloque la firma del pacto social”, *El País*, 4 de octubre de 1984.

²⁵⁷ Noticia, R.S. [Rodolfo Serrano], “La firma del pacto provoca fuertes tensiones internas en UGT”, *El País*, 4 de octubre de 1984.

A tal efecto, las Organizaciones firmantes del presente Acuerdo elevarán al Gobierno las correspondientes propuestas, a través del informe que deberá elaborar, en el plazo de seis meses, una Comisión constituida conforme al artículo siguiente.

Artículo 18. Comisión sobre Legislación laboral

La Comisión a que se refiere el artículo anterior, se constituirá por representantes de las Organizaciones signatarias del presente Acuerdo, y su composición será paritaria»²⁵⁸.

Es de agradecer a los redactores del AES que aquella ocasión fuera más *claros y específicos* que en la redacción del ANE, aunque los anteriores párrafos pudieran dar lugar a más de una interpretación, partiendo del hecho, a su vez, de que no existía acuerdo alguno en tales palabras. Inclusive el propio Corcuera –uno de nuestros grandes protagonistas en estas mismas páginas– hablaría en los siguientes términos sobre tal redacción:

«Son las fórmulas que se utilizan en la negociación colectiva cuando uno quiere flexibilizar la legislación laboral y otro no quiere. Cuando eso ocurre, como luego tienen que vender los acuerdos a los unos y los otros a los otros, valga la redundancia, pues se utilizan esas expresiones que con un encanto. Se sabía que era una controversia y que nunca iba a haber acuerdo. Los acuerdos a veces se sustancian con redacciones imaginativas, y ahí le echamos imaginación»²⁵⁹.

Sin embargo, no hay que ser un consumado experto en derecho laboral para comprender que la *ofensiva de la CEOE* había tenido un reflejo mayoritario en la redacción concreta de estos dos artículos aquí citados, por los motivos, causas y explicaciones que se han venido ofreciendo.

En un empeño desmedido por parte de Felipe González –quien se involucraría en esta cuestión como en otros pocos asuntos, a excepción de la OTAN, durante la primera legislatura– conseguiría doblegar la resistencia de Redondo en una reunión junto con Cuevas en el Palacio de la Moncloa el jueves 4 de octubre. En lo que se calificaría como otra nueva reunión de “máxima tensión”, lo único meridianamente positivo, desde el punto sindical más tras la lectura de los artículos 17 y 18 del AES, era que el Gobierno tenía la última palabra una vez que se había constatado como UGT “había llegado al límite de sus posibilidades”²⁶⁰. Allí en La Moncloa se pondría fin al drama del AES en términos políticos, tras la segunda intervención de Felipe González en tal proceso.

Un encuentro del que trascendió realmente poco a la prensa, más allá de que el mismo había servido para dar por concluido y aprobado el AES. Ha sido, una vez más, gracias a Mariano Guindal, por donde se ha podido acceder a una posible versión de lo que allí sucedió. Y es importante detenerse en tal descripción no sólo por los resultados inmediatos, sino por los costes y consecuencias que tendrá tal acuerdo en la progresiva separación y desconfianza, hasta el enfrentamiento entre el Gobierno/Partido y el Sindicato. Una lectura que, en cualquier caso, se contrastará, a su vez, con la dada por Almunia.

De esta forma, según el relato de Guindal –probablemente obtenido a través de conversaciones tanto con Cuevas como con Redondo– la situación que se viviría en los salones de La Moncloa alcanzaría su punto máximo histórico. Reunidos en la tarde del jueves, durante no pocas horas el acuerdo estaría a punto de naufragar a la hora de acordar la redacción del artículo 17 del AES:

²⁵⁸ Resolución de 9 de octubre de 1984, *del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, por la que se acuerda la publicación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 1985-1986, integrante del Acuerdo Económico y Social (AES), suscrito por la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Confederaciones Empresariales CEOE y CEPYME* [publicado, el 10 de octubre de 1984].

²⁵⁹ Declaraciones de José Luis Corcuera en, CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, *op.cit.*, p. 139, *nota 184*.

²⁶⁰ Portada, “Felipe González consigue el pacto social”, *El País*, 5 de octubre de 1984; Noticia, Rodolfo Serrano, “Felipe González consiguió ayer que CEOE y UGT llegaran a un acuerdo social para el resto de la legislatura”, *El País*, 5 de octubre de 1984.

«-¡Felipe, esto no lo firmo ni muerto! Me oyes, ¡ni muerto! –grito entre gestos y aspavientos el viejo León de Baracaldo.

-Nicolás, que esto no es el despido libre –le indicó Felipe González en un ejercicio de paciencia.

-No me fío, ¡estáis todos contra mí! –se quejó Redondo.

-¡Hombre, Nicolás! Yo lo máximo que puedo hacer es darle otra redacción más ambigua para que tú me lo aceptes y poder salvar yo la cara ante mi junta directiva –contestó el viejo zorro de la patronal.

-Puedes hacer lo que quieras, pero te advierto que no me vais a engañar».

A partir de ahí, y según el propio relato de quien fuera muchos años el cronista laboral de *La Vanguardia*, Cuevas volvería a su despacho y escoltado por Juan Jiménez Aguilar, procederían a dar una nueva versión. Entregada a Felipe González, quien la corregiría de “puño y letra”, y entrada a Redondo, obtendría la misma respuesta. En este punto muerto, Cuevas llamaría a Almunia, quien, en gran medida, ayudaría a desatascar la situación:

«-Joaquín, pero qué coño es lo que le molesta a Nicolás. ¡A ver si nos entendemos!

-¡Todo, José María! ¡Le molesta todo!

-¡Pues no hay acuerdo y se acabó! Si no flexibilizamos el despido, yo no firmo.

-¡Hombre, José María! ¿No podrías hacerlo aún un poquito más ambiguo?

-¡Pero cómo más ambiguo! Si ya no se entiende un carajo lo que queremos decir... Pero, bueno, le daremos otra vuelta».

Así sería. Nueva redacción y nueva reunión en Presidencia de Gobierno:

«-¡Pues yo no me fío ni de ti ni de José María! Porque esto dice lo mismo que decía el otro. ¿Por qué antes no lo querías firmar y ahora sí? Es que me estáis engañando [...].

-¡Hombre, que no, Nicolás! Que no nos va a engañar. Que José María lo que trata es de darnos una salida –dijo Felipe».

Sabiendo lo que se jugaba, Redondo trataría de enfriar la tensión y ganar tiempo. Puesto al habla con la CEC reunida de forma casi permanente, según narra Guindal, “[a]quel espectáculo duró desde la cinco de la tarde hasta las dos de la madrugada”, entre entradas y salidas para hablar por teléfono. De vuelta a casa, y con un Felipe González al que “casi le dio un ataque”, todo se resolvería con una llamada de Redondo a Cuevas a altas horas de la madrugada.

«-Oye, ¿tú te fías de este tío?

-¡Hombre!

-¡Pues yo no me fío nada! Y de ti no sé si fiarme

-¡Nicolás! Ese papel dice lo que dice y no hay ninguna intención oculta. Ya sabes que nosotros no hemos renunciado a defender la flexibilización laboral, como tú tampoco has renunciado a otras cosas. Compréndelo, yo tengo que defender esto, que es lo que existe en otros países. ¡Pero quédate tranquilo! Además tengo el suficiente grado de escepticismo como para saber que lo que firmaremos tampoco se cumplirá. ¡Vamos, que tendría que ser yo en estos momentos quien se negar a afirmar!

-¡Pues es que no tengo ningún interés en firmarlo!

-¡Tú verás. Yo tampoco... ¿Qué ha decidido tu gente?

-¡Están aquí, divididos! Aunque al final lo terminaremos firmando, pero siempre que no nos engañes... Porque el otro nos va a engañar seguro.

-¡Nicolás, que al fin y al cabo de ese tío es el líder de tu partido!

- Ya, pero yo de Felipe no me fío»²⁶¹.

Colgado el teléfono, finalmente, Redondo daría el sí. Visto lo anterior, es posible que así se decidiera el final agónico del AES. Cuando menos es una versión que aporta frescura y claridad más allá de la frialdad documental de las actas de la CEC y otros tipos de documentos aquí manejados. Ahora bien, la versión dada por Almunia contradice plenamente la de Guindal. Una lectura de los hechos un tanto personal por quien fuera Ministro de Trabajo, y en la que no se dudaría en culpabilizar a Redondo por el bloqueo y casi fracaso del AES:

²⁶¹ GUINDAL, Mariano, *El secreto de...*, op.cit., pp. 253-256.

«Miguel Boyer y no iniciamos –más adelante continué yo solo– en el verano de 1984, la negociación del Acuerdo Económico y Social. Comisiones dice, al comienzo del proceso, que no quiere firmar, de modo que nos quedamos negociando con la Patronal, CEOE, y con UGT. Al final Corcuera sí quería firmar el AES, comprobó que se ofrecían buenas condiciones para firmar, y Nicolás... Nicolás dice que no firma [...].

En los [...] días de octubre, Felipe nos convoca en su despacho a Nicolás Redondo, a José María Cuevas y a mí, para cerrar la redacción del Acuerdo. Nos dice que de allí no salimos hasta que no se apruebe un texto que a Nicolás le parezca asumible. Y Cuevas, el presidente de los empresarios, se pone en plan generoso, y dice: ‘Lo que quiera Nicolás’. Y se provoca una situación un tanto chusca, porque es Nicolás Redondo quien tiene la posibilidad casi exclusiva de proponer el texto del Acuerdo. Pero Nicolás no sabe cómo salir de ahí, no tiene capacidad para redactar el acuerdo. Fue una reunión un poco chusca, pero al final salimos de allí con el Acuerdo Económico y Social suscrito»²⁶².

Lo anterior, a su vez, nos conduce a otra evidencia: la constatación de que muchos de los detalles fundamentales por los que se cerrarían y se firmarían los grandes acuerdos que sustentaría el “modelo español de concertación social”, a buen seguro, nunca se conocerán de forma plena. Una realidad que sería avalada por dos figuras claves, como son Joaquín Estefanía y por el propio Rodolfo Serrano varios años después de la firma del AES: “El acuerdo estuvo al borde de la numerosas ocasiones. Y hoy, tres años después, aún quedan sin aclarar muchas de las incógnitas que estuvieron a punto de acabar definitivamente con la idea de la concertación social”²⁶³.

Pero el drama y su correspondiente escenificación continuarían por sus habituales tortuosos senderos algunos días más. Quedaban, por delante, algunos “formales” trámites. Primero, la redacción final del texto del AES en la sede de Trabajo el mismo viernes 6. En tal situación así como en plena euforia tras tantos meses, tras tantas reuniones, tras tantos problemas, Almunia –con gran perspicacia y mirada histórica– declararía como el AES constituía el “acuerdo de contenidos más amplios de todos los suscritos hasta ahora”, con el objetivo de “crear un clima de confianza, relanzar la inversión, generar empleo, despejar incógnitas y garantizar la paz social”, en la enumeración del gran *sueño liberal* de salida a la crisis económica. Quienes no mostrarían ningún tipo de entusiasmo hasta el punto de mostrarse inclusive pesimistas sería la insaciable CEOE: “[T]al vez no sea el mejor pacto, pero hemos hecho lo que hemos podido”.

Por lo demás, a partir de ahí comenzaría una lenta como ardua batalla en la interpretación de la *dichosa* fórmula de compromiso. Las dudas sobre lo que podía haber o no haber detrás del acuerdo finalmente adoptado pronto se trasladarían a diferentes niveles: “El escollo que ha estado a punto de hacer naufragar el acuerdo, se presenta ahora como una cuestión de matiz, de lenguaje o como dicen algunos, de semántica”. O tal vez, según ha reconocido alguno de los “participantes en las conversaciones, como excusa pública de razones mucho más profundas”. Para llegar a la siguiente conclusión: “[s]egún estas versiones, se trataba, sobre todo, de conseguir que en el acuerdo se asumieran principios en esta materia por encima de lo que finalmente se reflejara por escrito”.

Entre los “trámites molestos” estaba convocar a CCOO a la última reunión plenaria pública y oficial del AES, que en principio tendría lugar el día 8, lunes. Cita a la que se había comprometido el Ministerio de Trabajo y en donde se invitaría a las Comisiones Obreras a realizar un “acto de patriotismo” con el fin de que firmara el AES. En el largo tiempo que transcurriría entre que se convocaba o no se convocaba la reunión –aplazada sucesivamente desde hacía semanas, hasta que desapareciera, en la práctica, de la agenda política negociadora– Camacho bien apoyado por la votación aplastante del último CS enviaría una carta dirigida a González y otra a Redondo con fecha del 5 de octubre, en donde simplemente se limitaba

²⁶² Joaquín Almunia en a, IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, op.cit., pp. 171-172.

²⁶³ ESTEFANÍA, Joaquín y SERRANO, Rodolfo, “Diez años de relaciones industriales en España” en ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos...*, op.cit., p. 40.

apelar a su conciencia política. “Por encargo del secretariado [...] me permito apelar, a su conciencia de antiguo abogado laboralista, conocedor de las situaciones que generan estas decisiones, así como a su responsabilidad del presidente del Gobierno, en esta medida antiobrera y antisocial”. Añadiendo en la carta dirigida a González: “Son conquistas de medio siglo [...] que la gran patronal conseguiría eliminar con su ayuda y que la Historia juzgará muy duramente”. Con Redondo se mostraría hasta condescendiente, a la par que mostraría su “solidaridad frente a las brutales presiones a que habéis sido sometidos y que nos merecen un juicio durísimo”. A lo que sumaba el siguiente mensaje: “Estamos seguro [...] que UGT tiene el suficiente sentido de clase y como sindicalistas para no aceptar la renuncia a derechos históricos y a garantías mínimas que tienen los trabajadores frente a la arbitrariedad y al despido patronal”²⁶⁴.

Convocado para el sábado 6 de octubre un transcendental Comité Confederal extraordinario, por vez primera se filtraría a la prensa que desde la dirección del sindicato, no se tenía la seguridad de “ganar” aquella reunión. Sin duda un hecho del todo significativo del alcance de las cesiones de la UGT frente a la patronal y al Gobierno, y al mismo tiempo del *factor Corcuera*. Tan significativo que el mismo viernes 6 se invitaría a la reunión para la redacción del AES a las Federaciones más díscolas y críticas (Metal, Químicas, Construcción, Servicios Públicos, Comercio y Alimentación)²⁶⁵. Por primera vez, y tras los *avisos previos* del Comité Confederal extraordinario de noviembre de 1983, y los dos ordinarios de enero y junio de 1984, ¿la Ejecutiva podría recibir un voto masivo en contra?

En otro de los ejemplos de manipulación más descarnados –tan típicos como significativos de momentos históricos decisivos– que se conocieran durante los años ochenta, *El País* informaba en la portada de su edición del domingo 7 de octubre de 1984 lo siguiente: “La dirección del sindicato UGT aprueba, casi por unanimidad, el acuerdo social”. “El comité confederal de UGT aprobó ayer, por 115 votos a favor frente a cuatro en contra, el texto del Acuerdo Económico y Social (AES) para los dos próximos años de legislatura”. Una información en donde se decía también como “no faltaron fuertes críticas para algunos puntos concretos del pacto”; o bien, “ni estuvo ausente cierta sensación de frustración”. Inclusive afirmando: “Algunos de los sectores más críticos de la central socialista llegaron a afirmar que la aprobación del pacto había sido una cuestión fundamentalmente política”. Citando exclusivamente “fuentes oficiales”, Rodolfo Serrano construiría una crónica que más bien parecía una *nota oficiosa* de la dirección férreamente controlada por Antón Saracibar. Así también se podía leer: “Fuentes oficiales señalaron que la realidad es que las críticas no habían sido tan ácidas como se había insinuado”. Al menos se llegaría a reflejar en la citada crónica la extraña situación vivida a primera hora del Comité Confederal cuando se entregaría el texto del AES –de 89 páginas– y se daría unas horas para su lectura y análisis. Pero más allá de este pequeño incidente, la crónica de Serrano –en un tono sospechosamente edulcorado– dejaba claro el ambiente que se había vivido aquel plácido sábado:

«La organizada disciplinada de UGT, la coherencia interna del sindicato, y sobre todo, el convencimiento de que, como central socialista, no podía producirse un rechazo al acuerdo que colocara en desairada situación al Gobierno, evitaron, en gran medida, que las críticas se hicieran demasiado públicas. Sólo lo justo para hacer llegar a sus dirigentes el disgusto de un proceso cuyo futuro no ha sido despejado»²⁶⁶.

²⁶⁴ Noticia, “Derrota histórica de los trabajadores, según CCOO”, *El País*, 6 de octubre de 1984. También se informaba en aquella ocasión que, según un informe del sindicato comunista, la pretensión de la CEOE en relación a la directiva de la CEE de 17 de febrero de 1975 no se adaptaba a sus contenidos ni a las premisas finales argumentadas por la patronal.

²⁶⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “La patronal y UGT aseguran que sus posiciones sobre la libertad de despido han quedado incluidas en el pacto social”, *El País*, 6 de octubre de 1984.

²⁶⁶ Portada, “La dirección del sindicato UGT aprueba, casi por unanimidad, el acuerdo social”, *El País*, 7 de octubre de 1984; Noticia, Rodolfo Serrano, “El comité confederal de UGT asume casi por unanimidad el Acuerdo Económico y Social para 1985 y 1986”, *El País*, 7 de octubre de 1984.

En realidad, cuando se contrasta aquella información con el acta –partiendo de la evidencia de que, en no pocos casos, las reuniones se terminan ganando por quien escribe el acta, y que a su vez suele coincidir con la posición mayoritaria de la organización en cuestión–y más allá del aparente como contundente resultado, las crónicas periodísticas –desconociéndose si en tal ocasión, se levantaría el “veto” a la prensa para asistir al desarrollo del CC– no refleja la intensidad ni el drama que se vivió aquel sábado. En realidad, poco o más se podía saber a partir de la *nota de prensa* correspondiente y un intercambio rápido de opiniones con los presentes probablemente vía telefónica²⁶⁷. Más aún, pues tal sería la gravedad de lo que allí acontecería, y de su importancia, que hasta meses después no se decidiría hacer público –previa filtración interesada– una decisión de calado que venía a ser un reflejo del “ánimo político” de la organización frente al *factor Corcuera*.

Dos *pesos pesados* estarían cargo de la Presidencia y la de Vicepresidencia de la Mesa, Antonio Rosa y Benjamín Castro, respectivamente. Y como Secretario de Actas y Secretario de Notas, Antonio Cantero y Antxón Axo, quienes realizarían una ímproba labor al respecto, que los historiadores debemos agradecer.

Por una ocasión –excepcional, eso sí– se ha de destacar que se cuenta con una larga como aclaratoria *acta* del CC extraordinario²⁶⁸. Frente al llamativo silencio que desde las páginas de *Unión* se haría al respecto –un medio que solía dar cuenta de no pocos detalles de cada uno de los comités confederales, hasta parecer el mismo en ocasiones, un número monográfico, al respecto²⁶⁹– como decíamos se trata de una *acta* que nos permite, al menos, acercarnos a los grandes momentos de tensión y de crispación, pero que sobre todo confronta con la realidad dada en los medios de comunicación. Iniciada la reunión Saracíbar explicaría los porqués de la rapidez de la convocatoria, dando a los asistentes dos escasas horas para leerse el AES en su formato completo, y solicitar su “estudio en profundidad”. Una tarea sin duda exigente. Pero que las cosas no iban a ser sencillas para la CEC, tanto por el método negociador empleado –incluyéndose la nula información dada durante las semanas anteriores a los miembros del CC– como por el contenido del AES, lo dejaría bien claro Justo Fernández quien antes del receso denunciaría que no “le convencen las justificaciones que se han dado” para dicha convocatoria. De vuelta al plenario, y hasta la hora de la comida, Zufiaur, Corcuera y los miembros del Gabinete Técnico resolverían las dudas técnicas antes de entrar en el debate propiamente dicho.

Tras la mañana de lecturas, de reflexiones y aclaraciones varias, Redondo abriría el debate. *Viejo lobo* de la política y de la estrategia, cuya figura no se había cuestionado ni se cuestionaría en mucho tiempo en términos reales, empezaría empleando la clásica táctica dilatoria así como de llamada al cierre de filas con la Ejecutiva: “empezando por decir que no quiere condicionar el debate, porque siempre a uno le quedan dudas de si acierta o no, pero que la CEC se ha posicionado a favor del documento”. Recordatorio incluido del *valor supremo* de la concertación para la UGT, y, claro está, atacadas las actitud de CCOO por estrategia

²⁶⁷ Por ejemplo, la noticia al respecto por *ABC* se limitaba a señalar los aspectos más generalistas, afirmando que habían asistido 115 miembros del CC y que se habían emitido cuatro votos en contra de la Federación de Banca a la firma del AES; *La Vanguardia* en un reporte de Mariano Guindal finiquitaba el asunto con dos párrafos, hablando de 141 miembros. Como se puede observar mucho se cuidaría desde la CEC de UGT acerca de la cobertura informativa a dar. Noticia, Amancio Fernández, “El Comité Federal de UGT aprobó ayer el texto del AES”, *ABC*, 7 de octubre de 1984; Noticia, Mariano Guindal, “El comité federal de UGT aprobó el pacto con la crítica de algunas federaciones”, *La Vanguardia*, 7 de octubre de 1984.

²⁶⁸ Ha de remarcarse que no se ha podido localizar tanto la convocatoria formal de la reunión de la CEC de UGT en donde se tomaría tal decisión, como ya sucedería en noviembre de 1983.

²⁶⁹ Nos referimos, por ejemplo, al número 58 y número 59, correspondiente al mes de octubre. Tan sólo en el primero se publicaría una fotografía con el siguiente texto: «El Comité Confederal extraordinario, celebrado el día 6 de octubre, aprobó mayoritariamente, con sólo cuatro votos en contra, el documento del AES» (p. 3).

movilizadora de carácter político –“por su radicalización, con una postura irreflexiva y preconcebida, aunque las movilizaciones ya se saben que son problemas internos”– también se les acusaría en tal ocasión de cómo su posición había “debilitado las posibilidades de un acuerdo mejor”. Más suave a la par que condescendiente se mostraría con la CEOE. A lo que se añadiría una denuncia abierta –ahora sí, no como en el II Comité Confederal ordinario– en torno a la actitud vacilante del Gobierno y del Partido:

«El Gobierno también ha creado dificultades teniendo la UGT que soslayar escollos, sobre todo en temas que han creado tensiones en la familia socialista, como el tema de la Seguridad Social, agravado por un no posicionamiento del Partido Socialista y por su propio contenido».

Quitando importancia –pese a todo lo que ocurriría el día 4 de octubre– a la *dichosa* Directiva de la CEE, afirmaría, sin dudas, que todo se había solventado, y que era necesario pasar página. No se cuestionaría, ni de forma parcial, el denominado “apoyo crítico” al AES, bajo el argumento de que UGT es una “organización adulta [...] seria y responsable”. Tocaba, pues, defender el acuerdo en adelante y rentabilizarlo.

Y terminó Redondo, y se produjo lo que se sabía que iba a pasar. Más de veinte palabras pedidas. Todo un record. Claro está, allí se pusieron en marcha viejas como predecibles maniobras por parte del aparato, empezando por una masiva petición de palabras de los oficialistas y alargar el debate. Todo ello con el objetivo de cerrar filas en torno a la CEC y glosar las virtudes del AES con algunas ligeras críticas que hicieran constar que la Unión General de Trabajadores era una organización democrática y en donde se tenía el derecho a *disentir* con la Ejecutiva. Por ejemplo, Antonio Rosa tras matizar, sin mayores argumentos, como se estaba ante un acuerdo “necesario para el país, y absolutamente necesario para el Gobierno”. De hecho, propondría dejar el debate sobre las formas con que se había llevado la negociación para el “próximo Comité Confederal ordinario”. Por su parte Antonio Puerta –de la siempre poderosa Federación del Metal– quien llegaría a ver reflejadas inclusive las tesis congresuales ugetistas en el mismísimo AES, afirmaría con rotundidad como este “acuerdo es un paso más en el fortalecimiento de nuestra Organización a través del sindicalismo que preconizamos”. Se podía criticar la forma y el método negociador, pero no someter la “virtualidad de un Acuerdo por la forma en que se haya hecho”. Además el enemigo a batir era otro, antes que la Patronal: “El problema es CCOO”. A dichas *maniobras* también se sumaría uno de los pesos pesados que más pronto que tarde terminaría en la dirección del Partido en tiempos de divorcios y enfrentamientos familiares, tras recorrer parte de los caminos de Corcuera. Nos referimos a Justo Zambrana, quien sabía, de entrada de las dificultades que había entrañado la negociación como era consciente de su *difícil venta*. Después de recordar la tesis de la *misión histórica* del socialismo, o inclusive de plantearse si había llegado el momento de “prescindir del concepto de familia socialista”, llamaría al cierre de filas: “Tenemos que salir aquí a piñón fijo y superar las posibles contradicciones”.

Otras voces cercanas a la Ejecutiva pero ante todo distantes con los críticos, de quienes se había enseñado a desconfiar, depositarían su *voto positivo* sobre lo acordado por la Comisión Negociadora en base a lealtades o confianzas personales antes que por motivos políticos. No se pueden localizar por aquí tampoco grandes argumentaciones teóricas y/o ideológicas. La razón expuesta en más de una y otra ocasión: no era pensable ni imaginable que Redondo ni el resto de la CEC, pudieran llegar a engañar, mentir y menos manipular a los miembros del CC. O dicho de otra forma, estamos ante el tradicional *voto cautivo de las mayorías*, generalmente, *silenciosas*. Y no pocas intervenciones irían en esta línea. Por ejemplo, la de Isabel López, quien valoraría como positivo el acuerdo, y en “cuanto a la información, a la hora de votar, depositará su confianza en los compañeros de la CEC”, pero sobre todo mostrando su honda confianza en la palabra del “compañero Nicolás Redondo [...] de que no hay nada más allá de lo que está reflejado” en el texto. Otros como Victoriano Sánchez, por más que criticara el método como la falta de información a lo largo del proceso, tenía la “plena convicción [en el trabajo de] la CEC y la Comisión Negociadora” para dar su apoyo.

Como ya se ha podido deducir no pocas críticas irían dirigidas contra el proceder negociador, la falta de información o muy especialmente las extralimitaciones con que había actuado la Comisión Negociadora, y dentro de ahí un destacado miembro de la Ejecutiva: José Luis Corcuera. No sólo es que se hubiera visto desbordada la tenaz paciencia ugetista sino la confianza en la dirección. De hecho, el primero en intervenir en el CC sería Justo Fernández, convertido –a esas alturas– en la principal referencia crítica de la organización. Cansado de tanta falta de información pero sobre todo hastiado por las fuertes presiones recibidas por la CEC y el propio Felipe González para cerrar meses atrás el convenio colectivo de la Banca, diría: “no hay una Organización de primera y de segunda” en relación al ninguneo informador de la CEC. Pero es que además el AES –nadie lo expresaría tan claro– es un “mal acuerdo” y dudaba que fuera “el único posible”, citando entre otros aspectos el tema de la Seguridad Social. Y ello con dos consecuencias para nada desdeñables: “[t]odo el mundo dirá que lo negativo del Acuerdo fue el pacto que hizo la UGT”. Y ante todo: “El apoyo del Gobierno no nos va a proporcionar nada, sólo una situación de debilidad en las empresas”. J. M. Buzarra, volver a cuestionar como es “difícil defender algo de lo que no se tiene información”, indicaría como con el AES “tenemos que defender al Gobierno y no nos fiamos de él”. Fermín Carrero, no dudaría en referirse en como la UGT era la “peor” que había salido después de tantos meses de negociación. Encarna Asensio hablaría, ni más ni menos, que de “divorcio absoluto entre el Comité Confederal, incluida la CEC, con el resto de los trabajadores afiliados de UGT”. Y criticando los “métodos de la letra con sangre entra”. Teodoro Escorial, reconocería la difícil situación en que se había dejado a la central socialista ante las asambleas de CCOO... Otras intervenciones se podían citar.

¿Problemas? ¿Falta de información? ¿Un mal acuerdo? Para nada, según Corcuera, que empezaba a ver su omnímodo poder y autonomía política cuestionados, como ya había sucedido unos días antes en una complicada reunión de la CEC de UGT cuando por primera vez se tuvo que votar, saliendo derrotadas sus posiciones. Más allá de la falta de información que desde la CEC se había dado, tampoco se tenía que “hacer más caso” a los medios de comunicación. Eso para empezar. Segundo, si no se había informado es por las dificultades inherentes de transmitir tal cumulo de datos, pero sobre todo ya que en una simple circular no se puede poner diversos “aspectos”.

A falta de información, pues, tocaba confiar en la dirección. O eso al menos aseguraba el propio Secretario de Acción sindical, al igual que pedía un *acto de fe* cuando advertiría como la “CEOE no gana en esta negociación”. En suma, se estaba ante un “Acuerdo positivo”. Más aún, pues lanzaría toda una idea publicitaria a considerar: “AES se vende solo, comparándolo con los acuerdos anteriores”. Por si cabían dudas tras sus correspondientes y sesudas explicaciones, se afirmaría como no “hay nada oculto” en relación a las negociaciones con la CEOE en materia de flexibilización laboral, “ni intención predeterminada de la que el Gobierno quiera hacer”. No cabían mayores dilaciones por tanto. El AES era un buen acuerdo social, ya que fortalecía al Gobierno y si este se fortalece, “se fortalece a UGT”. “La UGT ha dado un paso histórico”. Ni con esas consignas militantes Corcuera convencería.

Tampoco convencería Zufiaur. El gran estrategia de la UGT desempolvaría a Gramsci para la ocasión, de cara a hablar de los “principios de realidad” para, de inmediato, justificar las decisiones ante el panorama político-económico reinante. “Este Acuerdo es el mejor que ha negociado la organización”, sentenciaría. De hecho, el pasado tenebroso reciente marcado por la oleada conflictiva obrera estaba demasiado cerca para nuevas *aventuras*. Incluso reconocería –he aquí otro hecho novedoso a tener presente– como la negociación convenio por convenio tras el *non nato* AI’84, había conllevado la pérdida de “conquistas en determinados convenios”.

Manuel Garnacho sería uno de los últimos en intervenir en ese largo primer turno de replicas. Con las consiguientes críticas a la metodología y la falta de transparencia, reconocería, no obstante, como el mismo había estado en uno de los “grupos privilegiados” y que gracias a ello había obtenido algunas informaciones más puntuales. Pese a todas las críticas y dudas que a él en nombre de FEMCA le surgían con respecto al ES, optaría por dar un voto positivo a través de la siguiente imbricada expresión: el “contenido global del Acuerdo no es negativo”.

Una forma diplomática de salir al paso, evitar posibles divisiones internas y tratar de ganar tiempo. En cualquier caso, no desaprovecharía para lanzar la primera de sus dos propuestas de resoluciones a votarse en el CC. En la primera de ellas se podía leer textualmente:

«Aceptamos la redacción del artículo 16º pero hacemos una propuesta para que la adopte el Comité Confederal: ‘El Comité Confederal resuelve desde ya cualquier intento por parte del Gobierno de disminuir por la vía legislativa las garantías y condiciones actualmente existentes para la tramitación de los expedientes de regulación, se encontrará con la frontal oposición de UGT’».

Y así llegaría la nueva intervención de Redondo, quien tampoco convenció, por más *tirara* de la retórica militante al uso: “Este acuerdo responde a lo que ha sido la filosofía de UGT en época de crisis”. Con la *venta* de los logros por delante, pedirá calma: “Esta Organización no se puede crispar más de lo necesario, por eso hago un llamamiento a todos al sentido de la responsabilidad”. Incluso reconocería como auto-crítica como la información “ha sido mala” pero “eso no pone entredicho el contenido del Acuerdo”.

Llegados a este punto, ¿por un momento pensaría la dirección ugetista que podía perder la votación? Lo cierto, es que poco más se sabe del contenido del resto de las intervenciones que se formularían en un segundo turno de replicadas. Hasta aquí llegaría la transparencia de la citada –y en parte glosada– acta del CC extraordinario. Simplemente se omitieron las mismas, más allá de citar nominalmente a los intervinientes. No se puede descartar, visto lo visto, los altos minutos de tensión que, a buen seguro, se producirían a continuación.

No hubo sorpresas, finalmente. Tan sólo cuatro votos en contra, procedente de la Federación de Banca como ya se ha adelantado. Pero no estaba ahí lo más trascendente de aquella reunión. Pues también se pasaría a votar la siguiente resolución propuesta por FEMCA:

«El Comité Confederal resuelve que los resultados de los diferentes trabajos de las Comisiones creadas por el AES serán comunicados y sometidos al Comité Confederal antes de su elevación al Gobierno».

De lo que no cabía duda alguna es que se había superado con *nota* el enésimo el problemático CC extraordinario. También probablemente uno de los más complicados de la *época de Redondo*. Eso sí, pero nunca antes la CEC había quedado de tal forma maniatada: 43 votos a favor, 21 en contra y 28 abstenciones en relación a la citada última resolución. El AES iba adelante, pero la Ejecutiva, con Corcuera a la cabeza, quedaba limitados en cuanto a sus posibles movimientos. Todo un hecho histórico que más pronto que tarde tendría sus diversas ramificaciones político-sindicales²⁷⁰.

A nivel de la calle, el AES no levantaría ningún entusiasmo popular ni las masas saldrían a la calle a celebrarlo, a pesar de que en aquellos días la información en los grandes medios de comunicación adquiriera un color extrañamente pro-gubernamental. E incluso se llegaría a retransmitir su firma en directo por TVE. Otra novedad del “modelo español de concertación social” en su *fase de desarrollo superior*, cuando ni siquiera era imaginable que una vez alcanzada tal “fase” vendría su rápido declive.

En aquel ambiente de celebraciones, o mejor dicho de autofelicitaciones, sin nada que perder tras todo lo que había sucedido durante los anteriores meses, desde Comisiones Obreras se iniciaría un duro ataque contra el acuerdo social en dos líneas. Primero, por la derechización gubernamental que había supuesto la negociación del AES: “[Felipe González] se ha humillado ante la patronal de la CEOE [...]”. Este acuerdo consagra la derechización económica del Gobierno y no resuelve ni uno solo de los problemas de los trabajadores”, declaraba Julián Ariza en un mitin en Madrid organizado por el PCE el domingo 7²⁷¹. De “deplorables” tacharía

²⁷⁰ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaria de Organización, “Acta de la reunión del II Comité Confederal Ordinario celebrado en Madrid el día 6 de octubre de 1984”, sig. 02607-003.

²⁷¹ Noticia, “Julián Ariza: «Felipe González se ha humillado ante la CEOE»”, *El País*, 8 de octubre de 1984.

ABC aquellos “excesos verbales” en un mini-editorial²⁷². Un día antes, en Málaga, Camacho denunciaría los elementos anti-constitucionales que se cernían sobre el futuro AES, empezando por la prevista Comisión de Asesoramiento –Artículo 19. Consejo Asesor del Presidente del Gobierno– que pretendía convertirse, a su juicio, en una “especie de sucedáneo vacío de contenido jurídico del “Consejo Económico y Social, que todavía sigue sin desarrollarse”²⁷³.

Mientras que la posición de CCOO ganaba adeptos entre la propia USO y la CNT²⁷⁴, la sospecha de que finalmente la reunión protocolaria prevista para el lunes 8, en donde se buscaría la *redención* del sindicato comunista, no se iba a celebrar terminaría por confirmarse en poco tiempo. Sin que mediará comunicado oficial de por medio, ni cualquier otro tipo de explicación, la que hubiera sido la undécima reunión plenaria no llegaría ser convocada jamás. La posible razón: muy probablemente tan sólo habría servido de altavoz para las reclamaciones y denuncias del sindicato comunista.

Aunque se había entregado la documentación a CCOO a las “primeras horas del día 6 de octubre” y se pretendiera que diera su firma en tan solo cuarenta y ocho horas –un reto que no estaba al alcance ni de la patronal– sin que hubiera negociado una sola línea de allí escrito, desde Trabajo también se filtraría oportunamente como “la intención era limitar al mínimo esta presencia, si CCOO no suscribía el acuerdo”. En esta situación, el Secretariado Confederal de CCOO sacaría una rotunda declaración. Probablemente, la más dura de todos estos complicados meses:

«1.- El abandono por el Gobierno, UGT y CEOE de la mesa de negociación formada en base a legitimidad representativa de las partes, con el consentimiento e impulso por el propio gobierno, desvirtúan el AES. Además, Gobierno, CEOE y UGT, implicados en este proceso son responsables de un grave y muy negativo precedente que desacredita la vía de la negociación en torno a los más difíciles e inquietantes problemas para la sociedad española como son el paro y la crisis».

En un gesto de reafirmación democrática de CCOO, tras denunciar su “rechazo a los métodos apuntados”, se recordaría, primero, como “por práctica unanimidad en su Consejo Confederal (con solo el 1,3% en contra), la C.S. de CCOO, se pronunciará definitivamente sobre el AES tras el período de asambleas de consulta a las organizaciones confederadas, delegados y comités de empresas”.

Y con respecto al último borrador del AES –entregado por Trabajo el de octubre– afirmarían como con tal acuerdo se “renuncia a la creación de empleo” y “ni siquiera hay compromisos de inversión para contener mínimamente el crecimiento del paro”. Pero no estaba ahí lo más grave por el futuro Acuerdo Económico y Social, “[s]e da un paso determinante hacia el establecimiento del despido libre y prácticamente gratuito en la dirección pretendida por la CEOE”. Más aún, pues “acentúa la inseguridad y precariedad del empleo”. Críticas y más críticas, junto con más evidencias –como la consabida pérdida de poder adquisitivo–, frente a los cual “CCOO hará el máximo esfuerzo por impedir la aplicación de los aspectos más negativos del AES fomentando la unidad de los trabajadores”.

Un comunicado que también saldría al paso de otro agudo problema, que en medio de conspiraciones y demás intrigas palaciegas, no se había abordado o directamente se había dado directamente por perdido. Nos referimos a las dudas jurídicas en torno a la eficacia del futuro.

²⁷² Editorial, “Aceptar la realidad”, *ABC*, 9 de octubre de 1984. Y se continuaba afirmando: «El presidente del Gobierno no se ha humillado, sino que se ha limitado, como en otros aspectos, admitir la realidad económica que ha acabado por imponerse en la Europa industrial [...]. En dos años de Gobierno, el socialismo ha dado la vuelta casi por completo, a su repertorio programático y parece orientar hoy una parte tan sólo de su proyecto económico hacia las tesis del neocapitalismo».

²⁷³ Noticia, Rodolfo Serrano, “El comité confederal de UGT asume casi por unanimidad el Acuerdo Económico y Social para 1985 y 1986”, *El País*, 7 de octubre de 1984.

²⁷⁴ Noticia, “La CNT, dispuesta a movilizarse con CCOO frente al AES”, *El País*, 8 de octubre de 1984.

De hecho, desde el mismo Ministerio de Trabajo se daba por descontado que la segunda parte del AES –la relativa a las cuestiones clásicas de un acuerdo interconfederal– no tendría *eficacia general*. Así paradójicamente el acuerdo que tanto había costado sacar adelante, afrontaba la cuestión de su naturaleza jurídica con más dudas que certezas²⁷⁵. A confirmarlo se sumaría la forma de publicación forzada en el AES –en un clara como burda instrumentalización– en el Boletín Oficial del Estado como se denunciaría desde múltiples instancias en las siguientes semanas²⁷⁶. Incluso aquí se perderían las formas y las apariencias en la forma y en el contenido. Así pues, y como se avisaba desde el SC, se había “estudiar todas las vías jurídicas convenientes para participar con pleno derecho e igualdad de condiciones en cuantas comisiones mistas y negociaciones específicas” surgieran al AES. Recordando por último la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto²⁷⁷.

A la espera de la firma y la correspondiente “fotografía de la paz social”, desde el Equipo Económico del Gobierno se daría fin a su mutismo público y mediático. Más allá de las prolíficas y continuadas declaraciones de Boyer durante los días siguientes –tras un prolongado silencio altamente significativo de la importancia otorgada por el Gobierno a la firma del AES y en donde su participación y opinión tan sólo lo hubiera dificultado– se daría a conocer el mismo día 8 de octubre las nuevas previsiones del siempre “fiable” *Programa Económico a Medio Plazo, 1984-1987*²⁷⁸.

Con fecha del 12 de septiembre –en pleno bloqueo del pacto social– se había rebajado muy considerablemente sus previsiones optimistas del mes de julio. Así en el documento base de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, se hablaba de la posibilidad de que el desempleo se redujera para final de la legislatura. En cualquier caso, de los 450.000 empleos más que se esperaban al final de la legislatura y que se habían estimado a principios de las negociaciones del AES, se pasaban ahora a tan sólo 200.000. Una rebaja no menor pero que no dejaba de ser, en todo caso, optimista, teniendo presente la larga duración de la crisis y los millones de puestos de trabajo destruidos. El siempre lamentado error de las previsiones volvería a producirse. Pero ante todo aquella revisión del PEMP conllevaría un par de novedades no menores: primero, la confianza en que los tipos de interés fueran disminuyendo según se acercara 1986; y en segundo lugar, se reforzaría la *fe* en la flexibilización del mercado de trabajo, como nunca antes se había hecho constatar en cualquier otro documento con membrete del Ministerio de Economía y Hacienda. Así en la página 41 se podía leer:

«La tasa de crecimiento de la productividad puede verse sensiblemente reducida en los próximos años ante las mayores facilidades de utilización del factor trabajo derivadas del comportamiento de los salarios y de las medidas de flexibilización del mercado de trabajo [en base al desarrollo legislativo de la RET’84], reducción que puede situar dicho crecimiento en un 2%, suficiente para lograr una mejora, con respecto al pasado, de la elasticidad del empleo con la producción, dando así lugar a un sensible crecimiento».

Tras anunciar, de nuevo, como se había tocado prácticamente fondo en la destrucción de empleo –“[t]odo parece indicar que estamos llegando al final del crecimiento del paro”– y

²⁷⁵ Al respecto nos remitimos aquí al aclaratorio estudio de, VILLA, Luis Enrique de la, “La naturaleza de algunos de los macro-pactos celebrados en España” en *Los grandes acuerdos y convenios colectivos a partir de la transición democrática. Antología*, Madrid, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985, pp. 27-41.

²⁷⁶ Resolución de 9 de octubre de 1984, del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, por la que se acuerda la publicación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 1985-1986, integrante del Acuerdo Económico y Social (AES), suscrito por la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Confederaciones Empresariales CEOE y CEPYME. Y también, Noticia, “La naturaleza jurídica del pacto y las comisiones de seguimiento”, *El País*, 6 de octubre de 1984.

²⁷⁷ AHT, CCOO-SC, “Declaración del Secretariado Confederal de CCOO ante la reunión del AES del 8.10.84”, sig. 005-012.

²⁷⁸ Véase lo apuntado en su momento en el apartado “6.2.1.1. Principios de realidad: el *Programa Económico a Medio Plazo*”.

mostrar su “optimismo”, dejaba caer la sospecha sobre las “estadísticas” de la OIT. No era la primera ni sería la última vez²⁷⁹. Tan sólo “retocando” las mismas –bajo el símil de la necesidad de una *aplicación rigurosa* de las normas estadísticas de la propia OIT– vía exclusión de quienes no buscaran “activamente” empleo, el informe concluía como se podría llegar a frenar el crecimiento de empleo. Lo que traducido, en términos prácticos antes que estadísticos, significaba que, en ningún caso, mejoraría la situación a final de la legislatura, y que las cifras manejadas, una vez más, no dejaban de ser una mera previsión sin la justificación metodológica correspondiente. Un *baño de realismo* a la par que de *interesada manipulación* de la realidad económica y estadística, que llegaba en un momento en que la tan buscada *paz social* parecía a estar al alcance de la mano del Ejecutivo. Lo que también quedaba claro es que el Gobierno no se movía una línea de lo proyectado con anterioridad y a la par que se mostraba como un alumno aventajado de las directrices del FMI y del BM²⁸⁰.

En resumen, tras tantos meses anunciando, primero, la posibilidad de apertura de una modificación parcial de la política económica; lo que posteriormente se transformaría en el ofrecimiento de cambiar la dirección de la citada política; hasta las diversas propuestas de negociar el meollo de la política económica; al final, en nada se quedaría tantos ofrecimientos y ofertas a la hora de discutir y negociar el contenido base del proyecto de modernización socialista. No sólo se continuaría con la misma política, con o sin AES, sino que quedaba meridianamente evidenciado que todas las declaraciones al respecto de negociar la política económica no tenían mayor trasfondo ni reflejaban una voluntad política real.

El triunfo de las posiciones del Equipo Económico del Gobierno, quien había aprendido las lecciones del *non nato* AI’84 pero sobre todo a mantener un prudente silencio tras lo acontecido con la siempre considera insuficiente RET’84, eran más que evidentes. Sin *quemarse* públicamente ni a nivel del Partido, guardando un perfil público-mediático bajo pero siempre atento y maniobrando en la *sombra*, había conseguido que se acordara el Acuerdo Económico y Social, que venía a profundizar su planteamiento económico originario, con escasas contraprestaciones sociales y menos a nivel de rentas. Una jugada maestra que venía a compensar tantos desvelos –que no sacrificios– en los últimos seis meses. En términos históricos, aquello terminaría por legitimar la política económica del Gobierno socialista, por más que la CEOE en un intento más publicístico que otra cosa, se evitará el mal trago de aparecer al lado de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que también mostró todo aquel trasiego de reuniones será el muy pequeño precio pagado por conquistar la *paz social*. Hecho reconocido inclusive desde las páginas del derechista *ABC*, a través de un artículo de opinión firmado por Eugenio G. Mata a un día de la firma del AES en donde se invitaba a los

²⁷⁹ Nos remitimos, de nuevo, al apartado aquí al apartado “6.2.1.1. Principios de realidad: el Programa Económico a Medio Plazo”.

²⁸⁰ Noticia, G. M. [Gustavo Matías], “El nuevo programa económico del Gobierno descarta la próxima reducción del paro, que crecerá este año en 200.000 personas”, *El País*, 8 de octubre de 1984. Tan frías como interesadas resultarían aquellas previsiones que en un comedido editorial de *El País* titulado precisamente, “Un prudente optimismo”, se afirmaba al respecto de la enésima revisión del PEMP, lo siguiente: «[L]a coyuntura aporta tantos claroscuros que no es posible hacer una definición tajante del momento económico [...]. Si, como ha dicho el ministro, estos presupuestos son el arranque de una nueva etapa, no se debe suponer que el giro sea copernicano, puesto que sus principios generales se corresponden más con una etapa de ajuste que de relanzamiento». Al respecto de la orientación continuista se indicaba: «El Gobierno recoge como suyas las sugerencias que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo a España en su último informe sobre nuestro país. Y hay que recordar que en la reciente asamblea del FMI y del Banco Mundial se insistió en la necesidad del ajuste, pero en un ambiente de cierto relajamiento, al menos psicológico, superior al de años anteriores. O sea, que la política de prudente expansión y el documento programático de la política económica para 1985 se mantienen dentro de la ortodoxia recomendada por los organismos de vigilancia del mundo occidental». Editorial, “Un prudente optimismo”, *El País*, 14 de octubre de 1984.

empresarios a invertir. Y aquello sí que constituía otra gran novedad en términos económicos y políticos²⁸¹.

Por último, y aunque pasará inadvertido la mayor parte de las veces, gracias a la escasa resistencia mostrada –una vez más– por la Ejecutiva de UGT, el AES, ahora sí y de forma definitiva, representaría el *gran salto adelante* en la flexibilización del mercado laboral. Enfrascada en su resistencia contra la modificación de los mecanismos de salida, esta relevante batalla no se daría con la intensidad que se había ofrecido en anteriores ocasiones, como tiempo tendremos de ver en las siguientes páginas.

12.2.5. El primer y el último acuerdo social de la época socialista: análisis del Acuerdo Económico y Social

«El acuerdo significa que una parte esencial del movimiento obrero está comprendiendo que un sindicalismo maduro y políticamente adulto debe emprender vías nuevas, con el coraje de quien rompe esquemas mentales que hoy podemos calificar de conservadores, poco audaces frente a las lecciones de una sociedad que cambia.

El acuerdo significa, también, el resurgimiento de una cultura sindical basada en la propuesta: de una cultura que razona y que reivindica pero que va más allá de los intereses fragmentarios e inmediatos para entrar en una lógica de participación y de corresponsabilidad nacional.

El acuerdo, significa, el rechazo, por otra parte, de una cultura sindical basada en la confrontación y en la conflictividad permanente y difusa, que tiene el peligro de hacer del sindicalismo ‘un guardián solitario junto a un cementerio de cenizas’ en frase del dirigente comunista de la CGIL, Luciano Lama».

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
*Presentación del AES*²⁸².

²⁸¹ El que era entonces el secretario general financiero adjunto al presidente de Unión Eléctrica-Fenosa realizaría las siguientes afirmaciones: «Es de justicia reconocer que la política económica seguida por el Gobierno en estos últimos meses va encaminada a establecer unos mecanismos y estructuras que permitan la reactivación de la inversión privada: la negociación del Acuerdo Económico y Social para el bienio 1986-1986; la flexibilidad en el mercado de trabajo, aunque todavía insuficiente y de elevado coste; la política de contención de salarios [...] entre otras, son medidas que, indudablemente crean un ambiente propio para que el empresario español abandone su actitud pasiva y coopere con ilusión para alcanzar ese objetivo prioritario de creación de empleo». Puestos a *agradecer* también se hacía mención del desgaste que tal política estaba teniendo en el seno del socialismo español: «El coste político que al Partido Socialista y al presidente del Gobierno, don Felipe González, le está suponiendo el seguimiento de estas medidas con sus bases más radicalizadas debe encontrar una respuesta coherente en el empresario español». Incluía llegado el caso mencionaba, como cita de autoridad, los *designios divinos* de cara a exhortar a la inversión. «Así se ha manifestado la Iglesia católica a través de los obispos, apelando a la ‘obligación moral de invertir’, aunque no se nos escapa eventualidad de que tal conducta pueda comportar hasta un riesgo físico, entendemos que ha llegado el momento de la coherencia, del coraje y de la esperanza ilusionada». MATA, Eugenio G., “Ha llegado el momento de invertir”, *ABC*, 8 de octubre de 1984. En esta misma línea véase, FIGUERAS, Josep M., “Reflexiones económicas a mitad de la legislatura”, *El País*, 29 de octubre de 1984.

²⁸² MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Presentación” en *Acuerdo Económico y Social 1985-86*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, p. 8. En la misma publicación institucional no se tendría tampoco reparo en afirmar: «CCOO que en las conversaciones preliminares había compartido la necesidad de un acuerdo de este tipo, no llegó a suscribir el AES, argumentando, por un lado, su oposición a aspectos formales de la negociación y, por otro, el hecho de que los contenidos del texto final no recogieran [...] su alternativa, por otra parte nunca suficientemente concretada, para la creación de empleo». *Ibidem*.

Como destacaría un editorial de *Gaceta Sindical* no faltarían las “notas exaltatorias” en la inmediata y posterior firma del AES²⁸³. Unos de los acuerdos sociales más publicitados y reproducidos de nuestra historia contemporánea. Desde la Presidencia del Gobierno²⁸⁴, desde el PSOE²⁸⁵ y desde el Ministerio de Trabajo, entre otros muchos ejemplos posibles que se podrían citar, no faltaron las publicaciones correspondientes del Acuerdo Económico y Social. Todo ello con una característica: cada una de las publicaciones resultaría más exaltatoria que la anterior. Por ejemplo, en la citada de Trabajo se hablaría del nuevo “clima de estabilidad que favorecía la inversión y el empleo”, de “clima favorable de entendimiento social para los dos próximos años”, o de cómo el AES era, sencillamente, el “camino correcto”²⁸⁶.

Tampoco ocultaría el propio Presidente su satisfacción en las palabras pronunciadas en el acto de su firma. Así señalaría como el “objetivo de la política económica del Gobierno, era, sobre todo, generar un proceso de inversión que creara puestos de trabajo”, junto con la necesidad de “crear las condiciones que facilitarían la reducción del dinero”, pero sobre todo “facilitar al mismo tiempo nuevas formas de contratación que pudieran permitir una más amplia generación de empleo”. Y claro está, “había que intentar llevar tranquilidad, paz a las relaciones industriales”. Para concluir:

«Reitero un pensamiento que he referido ya en muchas ocasiones: en épocas de crisis, intentar aunar esfuerzos desde la concertación, desde el diálogo, es el único camino para la superación eficaz de la crisis. Eso es más válido aún en una democracia como la española, todavía con una trayectoria corta, si se tiene en cuenta que la democracia tiene como fundamento la tolerancia, el diálogo, el respecto a las posiciones de los demás y la construcción entre todos de un sistema sólido»²⁸⁷.

Pero tal y como sucedió con los Pactos de la Moncloa o el propio ANE, una cosa era firmar los acuerdos y otra muy diferente que las partes contratantes estuvieran por la labor de cumplir el mismo. En especial, los apartados más espinosos referidos a las partidas presupuestarias y/o a las sociales. En lo que, sin duda, sería una de las grandes “jugadas maestras” de Felipe González al ser capaz de convencer, mediante promesas vagas y no del todo definidas, tanto a la CEOE y la UGT, pronto se evidenciaría como para el Ejecutivo el AES tenía un valor antes político –e inclusive “psicológico” como declararía el propio Presidente– que económico o social²⁸⁸. Lo que no es óbice alguno, para que el Acuerdo Económico y Social se transformara, en suma, en uno de los más precisos como valiosos instrumentos del proyecto de modernización socialista²⁸⁹.

²⁸³ Editorial, “El AES, un pacto insolidario”, *Gaceta Sindical*, nº 32, (1984), p. 3.

²⁸⁴ PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, “El AES y los acuerdos anteriores”, Madrid, Presidencia del Gobierno, 1984 [localizado en, AHFFLC, sig. AI-612-01]. Un amplio documento en donde se compararía el Acuerdo Social y Económico con los anteriores, en una versión un tanto edulcorada como a-histórica. También se publicaría un número monográfico especial de, *España Hoy* [Publicación mensual de la Oficina del Portavoz del Gobierno], en donde se incluiría una serie de entrevistas y de artículos de opinión con Redondo, Cuevas, Camacho, y, por supuesto, con Almunia.

²⁸⁵ PSOE, “Acuerdo Económico y Social (AES). 1985/86, Madrid, PSOE, 1984.

²⁸⁶ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Presentación” en *Acuerdo Económico y Social...*, op.cit., pp. 7-9.

²⁸⁷ GONZÁLEZ, Felipe, “Discurso del Presidente del Gobierno” en MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Presentación” en *Acuerdo Económico y Social...*, op.cit., pp. 13, 14 y 18, respectivamente.

²⁸⁸ El propio Oliet Palá hablaría de cómo el AES «pivotaba sobre un acuerdo sin contenido real, o mejor dicho, sobre un pacto para no decidir». OLIET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 194.

²⁸⁹ Consúltense aquí el trabajo de, VIDAL CARUANA, Gonzalo, *Acuerdo Económico y Social: 85-86: análisis*, Bilbao, CISS, 1984.

La historia del post-AES entre octubre/noviembre de 1984 a diciembre de 1986, es tan compleja e intensa que ofrece un material para una investigación monográfica, a pesar de que la escenificación teatral bajara, en adelante, varios escalones una vez firmado el mismo. A lo que se suma, como sigue siendo, enormemente, complicado localizar documentación de primer orden al respecto.

Aunque sea a costa de adelantar algunas cuestiones de relevancia, tanto la UGT como la CEOE terminarían desengañadas cuando no se sentirían traicionadas. En este mismo sentido, tanto desde el propio Ejecutivo como de forma específica desde de Trabajo, se haría del AES, en no pocos casos, terreno de uso y disfrute casi exclusivo. Hasta tal punto, por ejemplo, que a la finalización del citado acuerdo social, las grietas dentro de la familia socialista aparecían cada vez más evidentes. He aquí uno de los primeros *costes no deseados* del propio AES.

Más allá de su desarrollo pero sobre todo de las enormes dificultades que le acompañaron, en medios de fuertes polémicas y de agresivas campañas en su contra por parte de alguno de sus firmantes, el AES constituye el más largo como extenso documento, a nivel cuantitativo como cualitativo, de la historia de la concertación social en España. Y aunque en las siguientes páginas nos ceñiremos a los aspectos relacionados con el mercado de trabajo, no puede pasarse por alto que el propio AES también constituye la evolución más definida del “modelo español de concertación social”.

El AES sería publicado en el BOE el día 10 de octubre en un difícil como cuestionable equilibrio técnico-jurídico como en parte adelantáramos²⁹⁰. Solamente hace falta acercarse a su misma *Exposición de Motivos* en donde se justificarían las razones de su propia publicación en el Boletín Oficial del Estado, a través de la cita del Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, *por el que el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación asume parte de las funciones que tiene encomendadas*²⁹¹, el Real Decreto-Ley 5/1979, de 26 de enero, *sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación*²⁹², junto con una parcial lectura del artículo 80 de la Ley de 17 de julio de 1958, *sobre Procedimiento Administrativo*²⁹³. A lo que se sumaría, además, una inusual *Declaración del Gobierno*.

«El Gobierno de la nación manifiesta que su política económica para los próximos años se orienta de modo prioritario a la creación de empleo, generando un clima propicio que asegure la consecución de este objetivo».

Declaraciones, y como no, previsiones. Entre las principales cifras manejadas estaban las siguientes: “aumento de la actividad económica del 3 por 100 en 1985 y del 3,5 por 100 en 1986”. En relación a la inflación se hablaba de cómo el crecimiento económico ha de “alcanzarse sin menoscabo de la contención de precios que, medida por el Índice de Precios al Consumo, se cuantifica en un aumento del 7 por 100 para 1985 y del 6 por 100 para 1986”. Asimismo se contemplaba incrementar la presión fiscal estatal en “0,8 puntos en 1985 y se considera un aumento de este orden para 1986”. Por otro lado, el “objetivo del déficit público es del 5 por 100 del PIB para 1985 y del 4,5 por 100 para 1986”. También se comprometería a un “progresivo descenso de los tipos de interés”. Todo ello, junto con una “mejora de la gestión tributaria y en la lucha contra el fraude, una política industrial que acabe con la obsolescencia de ciertos sectores y mejore la competitividad de nuestro aparato productivo”. Sumado a la

²⁹⁰ Resolución de 9 de octubre de 1984, *del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, por el que se acuerda la publicación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 1985-1986, integrante del Acuerdo Económico y Social (AES), suscrito por la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Confederaciones Empresariales CEOE y CEPYME*.

²⁹¹ Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, *por el que el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación asume parte de las funciones que tiene encomendadas* [B.O.E. 5 de diciembre de 1991].

²⁹² Real Decreto-Ley 5/1979, de 26 de enero, *sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación* [B.O.E. 6 de febrero de 1979].

²⁹³ Ley de 17 de Julio de 1958, *sobre Procedimiento Administrativo* [B.O.E. 18 de julio de 1958].

“creación de empleo con un aumento neto, en 1985, no inferior a 25.000 trabajadores en la Administración Pública”.

Ya en el titulado *Capítulo Único* se entraba a concretar la *naturaleza de lo pactado*, en donde se establecían dos partes claramente diferenciadas, por un lado, un acuerdo social, y por otro, un acuerdo interconfederal. Dada su importancia y las controversias que seguirían a la firma del AES, textualmente se señalaría:

«En el Título I, el Gobierno, CEOE, CEPYME y UGT, suscriben determinadas estipulaciones que afectan a compromisos de carácter fiscal, de carácter económico, desempleo, contratación laboral y formación profesional, Seguridad Social y Seguridad e Higiene, legislación laboral, participación, Empresa pública, patrimonio sindical acumulado y retribuciones de los empleados públicos. Nos hallamos, pues, ante un amplio abanico de estipulaciones de carácter tripartido, configuradoras de obligaciones de hacer para las partes firmantes, en sus respectivos ámbitos de competencia.

El título II contiene los compromisos de carácter bilateral que suscriben UGT, CEOE y CEPYME, que tienen la naturaleza y efectos de los Acuerdos Interconfederales».

Estipulada su duración en el artículo 2 sobre para los años 1985 y 1986, también se incluía la creación de la llamada “Comisión de Seguimiento del AES”.

En realidad, la parte más interesante como novedosa sería la del acuerdo social enmarcado en el Título I. Más allá del artículo 3 y del artículo 4 destinado a *incentivos fiscales a la inversión* –en donde se incluirían una clara serie de medidas que reflejaban los *triumfos* de la CEOE– los siguientes –en concreto el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 8– constituían buena parte de las mayores novedades del propio AES. Así en el artículo 6 dedicado a *Inversión Pública* se destinaría, “hasta un montante total de 50.000 millones de pesetas”, de cara a la “inversión pública”. En el artículo 7, se volvería a incrementar las cantidades destinadas a los conciertos con el INEM, que –como analizado en otros apartados– desde tiempos de la UCD habían sido empleados de forma intensa por la CEOE. En aquella ocasión se destinarían 30.000 millones que “permitan la contratación de 160.00-190.000 trabajadores desempleados”. Cifras, realmente altas, pero también bastante inexactas y que dejaban, en suma, un considerable margen de actuación.

Ahora bien, es el artículo 8 dedicado al tan discutido Fondo de Solidaridad, en donde además de crearse un “Comité Tripartito” para su seguimiento, se le dotaba de 60.000 millones de pesetas, de cara al “apoyo salarial y las nuevas contrataciones”, en una nueva muestra de subvención por el mero hecho de contratar. No obstante, no estaría ahí los mayores obstáculos, sino en los propios porcentajes a aportar por cada parte.

«La financiación del Fondo de Solidaridad será realizada por terceras partes, por los trabajadores, las empresas y los Presupuestos Generales del Estado. Para ello se creará, durante 1985, una cotización excepcional de 0,56 por 100 sobre la base de cotización por Formación Profesional, repartida de modo que el 0,29 por 100 será cargo de la empresa y el 0,28 por 100 a cargo del trabajador. Los Presupuestos Generales del Estado incorporarán una dotación de 20.000 millones de pesetas».

Pero tal y como se denunciaría desde CCOO a los empleadores tal aportación se vería recompensada a través del artículo 11. Cotizaciones Sociales en donde en su punto a) se decía: “Se reduce en 0,3 puntos el vigente tipo de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, Régimen de Autónomos y demás Regímenes asimilados, con efecto de 1 de enero de 1985”. Igualmente se ha de tener en cuenta que de cara a la financiación del Fondo de Solidaridad, a los funcionarios de la Administración del Estado se le descontaría el “0,25 por 100 de la masa de retribuciones”

No obstante, y antes de internarnos por los artículos dedicados a las cuestiones laborales, asimismo el AES, contemplaría, por ejemplo, otros tres elementos a tener presentes. Primero, la *revaloración de las pensiones de la Seguridad Social* –vía artículo 12–; segundo la mayor atención a la cuestión de la *Formación Profesional*, en donde se aprobaría la creación de un Consejo General de la Formación Profesional –mediante el artículo 16–; y en tercer lugar –y

aquí de forma destacada— por el 13 se constituirá la Comisión Tripartita de la Seguridad Social, de cara a “afrontar cuanto antes un proceso de reformas en el actual sistema de Seguridad Social, de modo que puedan eliminarse las incertidumbres surgidas, y se definan bases firmes sobre las que asentar su futuro”. De la importancia pero sobre todo de la urgencia de llevar a cabo la misma, da buena cuenta como se acordaría constituir la citada Comisión “dentro de quince días, a partir de la firma [...] [para] que en el plazo de tres meses, proceda a un examen de conjunto del actual sistema de Seguridad Social”²⁹⁴. La redacción de dicho artículo, por cierto, sufriría alguna que otra “ligera” alteración hasta llegar al BOE por una serie de motivos que se detallarán en las siguientes páginas.

De la misma no se puede obviar, por último, un acuerdo que pasaría bastante desapercibido pero que constituiría en otro de los grandes triunfos de la CEOE. Nos referimos al artículo 21 referido a la Empresa Pública, en el que se podía leer:

«La CEOE y CEPYME elaborarán un Informe en que se analizará el papel de la Empresa Pública, dentro del contexto económico nacional, atendiendo a criterios de racionalidad, competitividad e incidencia e importancia de los sectores estratégicos en el conjunto del sector público».

Todo ello a cambio de una *pírrica* victoria por parte de la UGT al asegurarse como “sindicato firmante de este Acuerdo” como se “iniciarán de manera inmediata [la] negociación para el establecimiento de medidas de participación sindical referidas al incremento de los derechos sindicales en la Empresa pública”. Y matizábamos que se trataría de una *pírrica* victoria, por el mero hecho de que tales derechos y posibilidades estaban garantizados en la LOLS.

Yendo ya a lo realmente relevante, y en concreto, a lo relacionado con el mercado laboral, junto al tantas veces citado artículo 17, al que habría que sumarle el artículo 18 por el que se crearía una Comisión sobre Legislación Laboral, sin obviar, a su vez, la también creación del Consejo Asesor del Presidente del Gobierno —artículo 19— que nunca llegaría a constituirse, o la definición de las competencias de la también citada Comisión de Seguimiento en el artículo 23; los dos artículos claves serían el artículo 10 y el artículo 15. Con respecto al primero de los citados, se trataría de reforzar la protección a los desempleados. De hecho, el mismo se transformaría en un objeto de muy duras disputas en el futuro inmediato entre UGT y el Gobierno/Trabajo en torno a su incumplimiento²⁹⁵.

A partir de la reforma de la LBE que se había publicado en agosto mediante la Ley 31/1984, se tendría por objetivo que la “cobertura de las prestaciones por desempleo aumente hasta alcanzar valores equivalentes en relación al paro registrado en las Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo del 43 y 48 por 100, respectivamente, a finales de 1985 y 1986”. Un *viejo objetivo* programático de los socialistas, con el apoyo expreso de UGT, para el que no se concretarían partidas presupuestarias. He aquí uno de los principales obstáculos que, poco a poco, enturbiarían las relaciones de la familia socialista de forma más directa. De hecho, el propio Almunia reconocería el error de haber firmado tal compromiso:

«Es el típico compromiso que no debe ser aceptado nunca por un Gobierno, porque no se tiene ninguna capacidad de operar sobre él. Pactamos en el AES unas correcciones en la legislación por desempleo y dijimos: esto garantiza la cobertura del 48 por ciento. Pero como eso depende de cómo evolucione la oferta y la demanda de puestos de trabajo, se incumplió el compromiso, lo que motivo que a finales de 1985 ya se hablara por parte de la UGT de incumplimiento del AES»²⁹⁶.

²⁹⁴ Nos remitimos aquí a, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Documento base sobre la reforma de la Seguridad Social para la Comisión tripartita del Acuerdo Económico y Social (AES)*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.

²⁹⁵ Nos remitimos aquí a lo apuntado en la *nota 142* y al apartado “8.3. El «precio» de la modernización: los *costes sociales y humanos*”.

²⁹⁶ Declaraciones de Almunia a, MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, op.cit., p. 126.

En lo referente al segundo aspecto que no es de interés en el artículo 15. *Modalidades de contratación*, se previa el tantas veces esperado desarrollo reglamentario de la Ley 32/1984. Todo ello a través de un texto, en donde no se especifica ningún acuerdo concreto, más allá de las consabidas buenas voluntades y la confianza en que el “próximo desarrollo reglamentario dé plena virtualidad a todas estas positivas innovaciones, eliminando obstáculos y condicionamientos innecesarios”. El único tibio compromiso residía en la parte empresarial y no parecía que pudiera comportar mayores inconvenientes de cara a su cumplimiento:

«CEOE y CEPYME, una vez que se promulguen las correspondientes disposiciones reglamentarias, darán amplia difusión a las mismas entre las Organizaciones empresariales y las Empresas, prestando especial atención a las nuevas medidas encaminadas a promover la inserción profesional de los jóvenes mediante contratos en prácticas y de formación».

La historia del ANE se volvía a repetir: se evitaba concretar mayores acuerdos o compromisos por escrito, con el fin de evitar potenciales problemas internos que hubieran podido ocasionar algún inconveniente y/o obstáculo para la firma de la UGT²⁹⁷. Téngase en cuenta, que entre los documentos presentados al Comité Confederal extraordinario de la primera semana de noviembre, no se entregaría a los asistentes los relacionados con las figuras contractuales, a pesar de disponer de varios borradores fechados en julio y de octubre. Igualmente se ha de tener en cuenta –como veremos a continuación– como a pesar de la firma del AES y de la inicial voluntad política, no faltarían, casi de inmediato, las desconfianzas ante la forma de proceder desde Trabajo en la publicación en el BOE del nuevo *pack legislativo*, en especial en relación a la figura de lanzamiento por nueva actividad²⁹⁸.

Como avanzábamos la segunda parte del AES –recogida en el Título II– no presentaría mayores novedades jurídicas o técnicas, al tratarse, simplemente, de un Acuerdo Interconfederal. Un AI, recordemos, que sin la presencia de CCOO carecía también de eficacia general, como se estipulaba en su propio artículo –referido a su *Naturaleza jurídica*– y en el que se constataba como lo “acordado tendrá naturaleza contractual, y por tanto, generará obligaciones y compromisos por ambas partes”.

Dos son los puntos principales a destacar, en tanto la mayor parte del resto conforma un AI clásico, con muy pocas variaciones de los anteriormente firmados, como acabamos de insistir. En primer lugar, el AES en su vertiente interconfederal supondrá un nuevo respaldo a la denominada política de “moderación salarial”. O mejor dicho, a la pérdida de capacidad adquisitiva, aunque con una tendencia menos aguda que durante 1984.

Vayamos, primero, a los textos de los acuerdos, teniendo en cuenta las previsiones gubernamentales de inflación al respecto –7% para 1985 y 6% para 1986– Así en el artículo 3, se podía leer:

«Los crecimientos salariales a aplicar en los Convenios Colectivos a negociar durante 1985 serán establecidos entre el 5,5 por 100, como mínimo, y el 5,5 por 100, como máximo.

Los incrementos salariales para 1986 se establecerán en base a la previsión de inflación del Gobierno para ese año, de forma que el mínimo de la banda sea igual al 90 por 100 y máximo al 107 por 100, en ambos casos, de dicha previsión.

²⁹⁷ En concreto se podía leer: «Las Organizaciones firmantes han podido constata que la nueva normativa sobre contratación aprobada por las Cortes Generales por Ley 32/1984, de 2 de agosto, introduce innovaciones positivas para el empleo; en especial, para los jóvenes (contratos de trabajo en prácticas y para la formación), así como las modalidades a tiempo parcial y por lanzamiento de nueva actividad. Otra novedad a destacar es la regulación del contrato de relevo, modalidad contractual, por Ley 32/1984, de 2 de agosto (artículo 12.5) y disposición adicional 7 del Estatuto de los Trabajadores. Las partes firmantes entienden que, en determinados casos, estos contratos pueden favorecer la lucha contra el desempleo y el acceso a los jóvenes a puestos de trabajo existentes en las Empresas. Por ello, los Convenios Colectivos, a la vista de las normas reglamentarias que en su día se dicten, recogerán en sus estipulaciones esta posibilidad debiendo las Empresas, si el derecho es ejercido por el trabajador afectado, cumplimentar las formalidades que conduzcan a la realización del correspondiente contrato de relevo».

²⁹⁸ Véase lo apuntado en la *nota 132*.

Los crecimientos salariales para 1985 y para 1986 se estipularán de acuerdo con las condiciones del punto 2, de este artículo teniendo en cuenta lo que se establece en el artículo 4».

¿Qué decía el punto II? Pues en lo básico se repetían todas las salvedades que se habían establecido en anteriores AI, a la hora de poder no aplicar tales subidas en casos. Por ejemplo en “[e]mpresas que acrediten, objetiva y fehacientemente, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios contables de 1983 y 1984. Asimismo se tendrán en cuenta las previsiones para 1986. En cuanto a 1986, se contemplarán los periodos equivalentes”. A saber, se establecerían no pocas *vías de escape* a la hora de aplicar la banda salarial. De la misma forma, se tiene que traer a colación como en la parte del acuerdo social del AES, a través de su artículo 9 destinado a “Retribuciones del personal del servicio de las Administraciones” Públicas, se establecería un “incremento del 6,5 por 100” para el conjunto del sector público.

Pero otro lado, en esta ocasión la UGT conseguiría introducir la siempre buscada “Cláusula de revisión salarial”, a través de una redacción un tanto ambigua como confusa del artículo 4, que muy pronto iba a desatar la primera gran crisis en torno al AES:

«En el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC), establecido por el INE, registrará al 31 de diciembre de 1985 un incremento superior al 7 por 100 respecto a la cifra que resultara de dicho IPC al 31 de diciembre de 1984, se efectuará una revisión salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra. Tan incremento se abonará con efectos de 1 de enero de 1985, sirviendo por consiguiente, como base de cálculo para el incremento salarial de 1986, y para llevarlo a cabo se tomarán como referencias los salarios o tablas utilizados para realizar los aumentos pactados en dicho año».

Con o sin cláusula de revisión salarial de por medio, lo único cierto es por esta mismas vías, desde el Ejecutivo se volvería a marcar un *tanto* en relación a la legitimación política e institucional de su denominada política de moderación salarial. Por centrarnos tan sólo en los datos apuntados en la “Tabla 46. Evolución de los salarios pactados en la negociación colectiva, la inflación anual y el poder adquisitivo, 1982-1992”, entre otras posibles que figuran en el *Anexo estadístico*: en la misma se refleja como para 1985 los salarios finalmente pactados en convenio alcanzarían el 7,90% mientras que la inflación total sería del 8,80%, y para 1986 se pactaría el 8,23% mientras que la inflación total sería del 8,80%. Lo que traducido en términos precisos significaría una pérdida total de poder adquisitivo de 1,47 puntos, al menos, en los salarios pactados por convenios. A saber, los más y mejor protegidos.

En resumen, tanto en su vertiente del acuerdo social como en su parte interconfederal, el AES se constituiría –sumada a su pregonada relevancia *política* como *psicológica*– en un instrumento idóneo tanto para la legitimación de la política económica socialista, por más que desde la CEOE se tratará de evitar, a toda costa, este “mal mayor”. En segundo lugar, se transformaría en el necesario mecanismo para continuar con la ya menos agresiva política de pérdida de poder adquisitivo, como condición *sine qua non* para el conjunto del proyecto de modernización socialista. Y por último, y en tercer lugar, sería la vía empleada para la definitiva liberalización y flexibilización del ordenamiento jurídico-laboral español, por más que no se terminara cediendo a los “compromisos” adquiridos con la CEOE en materia de despido colectivo. Por tanto, su importancia en términos históricos es indudable, más teniendo en cuenta que sería el primer como último acuerdo social que se firmaría a lo largo de la época socialista.

12.3. La larga *resaca* del AES (octubre/diciembre 1984-1985/1986)

A buen seguro no ha habido firma de un pacto social en la historia de la concertación social en España menos celebrada. Hasta tal situación que la fotografía del aquel evento en el Palacio de la Moncloa no ha pasado a ningún tipo de anuario, por más que fuera retransmitida la *gala* por TVE. Tras meses de ocupar portadas, editoriales, artículos de opinión, reportajes... el evento de la firma no sería llevado a ninguna de las portadas. Ni de *El País* ni de *ABC*.

A falta de cualquier dosis de *entusiasmo* por parte de los firmantes en los días y semanas siguientes, lo que no faltaría serían las descalificaciones, los ataques personales y los desmarques sobre la validez o no del AES. Así la tan buscada *paz social* nacía un tanto devaluada y marcada por la falta de confianza entre los agentes sociales y el Gobierno. De tal forma, que entre octubre a finales de año del *drama* se pasaría a la *resaca* del AES.

El *shock postraumático* tendría varias dimensiones. Primero, ante la campaña desatada contra Comisiones Obreras y más concretamente hacia su Secretario General, Marcelino Camacho, por parte del Gobierno –con González y Almunia de principales protagonistas– así como por parte de *El País*. Especialmente relevante sería la de este medio –tras otras campañas similares– en donde se desataría, prácticamente, una *caza de brujas* que alcanzaría unos límites insospechados.

En paralelo, el desarrollo jurídico y reglamentario del AES, a través de sus 16 comisiones previstas, no sería fácil en absoluto. Junto con las demandas presentadas por CCOO en el Juzgado de Guardia correspondiente contra su exclusión en el desarrollo del AES en su aspecto interconfederal; se evidenciaría los *otros verdaderos* objetivos del Gobierno con la firma del acuerdo social tras abrir casi, en primer lugar la Comisión para la reforma de la Seguridad Social. También en este tiempo se publicaría el desarrollo jurídico de la RET’84, cuyas normativas tendrían la virtud de no satisfacer a ninguna de las partes implicadas. Con el XXX Congreso del PSOE a la vista –a mediados de diciembre– y en pleno debate de la OTAN, una parte de la familia socialista, la *sindical*, entraría en una pelea interna en donde lo personal y lo político no podían ni debían separarse. E inclusive, en este meses de la inicial resaca las buenas relaciones personales y políticas entre la patronal y el Gobierno, empezaría a verse sensiblemente deterioradas, ante la cada vez más constatada realidad de que una cosa era firmar un acuerdo *blanco* sobre *negro* y otra a desarrollarlo y cumplir determinados compromisos.

12.3.1. Historia de una *fotografía*: un acuerdo social que no termina de arrancar

«La firma solemne tuvo lugar el 8 de octubre de 1984, en el patio de columnas de La Moncloa. Se dispuso de una mesa principal, en la que los tres máximos responsables del Gobierno, UGT y CEOE firmaron el acuerdo ante las cámaras de televisión. Detrás, en varias filas de sillas, nos sentamos los miembros de las respectivas comisiones negociadoras. Yo estaba agotado, pero muy satisfecho. Había culminado con éxito una tarea muy difícil, y el contenido de lo pactado me parecía importante: sobre todo, porque los cambios que a partir del acuerdo íbamos a introducir en el mercado de trabajo, junto con la moderación salarial, eran muy necesarios para facilitar nuestra adaptación a la nueva situación creada por el ya cercano ingreso de España en la CEE. Además, con el AES se había recuperado el diálogo social roto desde comienzos de año, aunque CCOO se hubiese quedado fuera de él».

Joaquín ALMUNIA, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (1982-1986)²⁹⁹.

A menos de un día de que se firmase al AES, Felipe González contestaba la misiva de Camacho en la que le pedía que no firmara el pacto social alegando a su conciencia laboralista. En lo que entonces pareció una simple salida airada del Presidente cuando ni siquiera era pensable –al menos para la ciudadanía en general y la dirigencia de CCOO en particular– lo que iba a suceder en los siguientes días y semanas; le vendría a decir al histórico dirigente obrero que su carta venía a “vulnerar la verdad”, en tanto sobre el tema del despido libre no se hablaba ni una sola línea en el AES. Tras acusar de manipular los hechos y de mentir, concluía con la siguiente aseveración: “es aún más falso porque usted sabe perfectamente que yo no lo

²⁹⁹ ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, op.cit., p. 175.

consentiría, ni desde mi conciencia de antiguo laboralista, como usted dice, ni como presidente del Gobierno”. Daba ahí inicio a una larga batalla de fondo³⁰⁰.

Sin ningún voto en contra, el Comité Ejecutivo de la CEOE –tras su *dorada* etapa asamblearia– votaba a favor del AES. Ahora bien, una cosa era firmar y otra muy distinta apoyar y desarrollar el pacto como acabamos de remarcar. La lógica discursiva ya dañada se volvía a ver perjudicada. Recordaría en aquellas fechas Juan Jiménez Aguilar –el mismo que declararía que la CEOE no había arrancado ni una sola mejora con el AES– lo siguiente al respecto de la manida interpretación sobre el artículo 17 y 18: “Es que el compromiso no es archivarlas [en caso de que el Gobierno no cumpliera su promesa en relación al *despido libre*], sino remitirlas en forma de proyecto de ley al Parlamento”.

En una sucesión de lecturas cada vez más trepidantes, el mismo Segismundo Crespo dejaba *caer* –en una entrevista en *Diario 16* en aquellos mismos días– de que tal y como estaba el texto el Gobierno no había asumido ninguna “obligación”. Había *voluntad* pero no *obligación*, según la consigna gubernamental. Más cauto Almunia señalaría como en “el peor de los casos, en materia de despido colectivo, únicamente desaparecería la intervención obligatoria de la autoridad laboral, pero no la consulta a los representantes sindicales”³⁰¹.

El martes 9 de octubre de 1984, por fin, llegaba el gran momento. “La firma del AES ha supuesto un gran éxito de negociación para José María Cuevas” informaba *ABC* en su siempre variado apartado de *Actualidad Gráfica*, a modo de consigna editorial. El mismo periódico que había sido capaz de rechazar cualquier tipo de pacto social en tanto atentaba contra las buenas costumbres del libre mercado, se mostraría ahora entusiasmo con el propio AES hasta publicar íntegramente el texto en una separata especial. Ahora bien, con el mismo espíritu no dejaría de criticar abiertamente la decisión del Gobierno de retrasar la presentación de los Presupuestos Generales a menos de 24 horas de la firma del AES³⁰².

Más allá de estos pequeños detalles –como el hecho de que los cronistas laborales tras ser desplazado a una sala adjunta para seguir el transcurso del acto por televisión, no pudieran ver el acto por un “fallo técnico”– la *tranquilidad* que otorgaría la *fotografía* de la teórica *paz social* dudaría hasta la posterior rueda de prensa, en donde cada uno de los firmantes dejarían asentadas sus posiciones e interpretaciones. Por parte de González y Boyer –quien alabaría la *colaboración* frente a la *confrontación* e indicaría que lo peor del ajuste salarial había pasado por enésima vez³⁰³– confirmarían lo que era un secreto a voces: el AES constituía un *buen pacto social* que encajaba con el PEMP y servía para continuar el camino emprendido hacía casi dos años tras la victoria electoral. Más distantes se mostrarían desde la patronal –incluida

³⁰⁰ El mismo lunes 8 Gerardo Iglesias calificaría la posición del Gobierno en relación al AES como una «bajada de pantalones». Añadiendo como la política económica del Gobierno dependía de la «estrategia emanada de Ronald Reagan, el Fondo Monetario Internacional y las multinacionales, que para lograr sus objetivos necesitan un debilitamiento del poder sindical. Lo que pasa es que esta situación resulta más difícilmente comprensible en un partido que se califica de izquierdas como el PSOE». Noticia, “El PCE acusa al Gobierno de «baja de pantalones»”, *El País*, 9 de octubre de 1984.

³⁰¹ Portada, “El presidente del Gobierno acusa a Camacho de manipular el pacto social”, *El País*, 9 de agosto de 1984; Noticia, Rodolfo Serrano, “Felipe González acusa a Comisiones Obreras de manipular deliberadamente el pacto social hablando de despido libre”, *El País*, 9 de octubre de 1984.

³⁰² Editorial, “Conflicto institucional”, *ABC*, 9 de octubre de 1984. Entre otras medias-verdades se señalaba –tras haberse siempre posicionado al lado de la posición de la CEOE con respecto a los propios PGE– lo siguiente: «[E]n este caso no se comprende, además, el aplazamiento cuando existe la posibilidad, también constitucional, de proponer enmiendas a los presupuestos con la conformidad del Gobierno».

³⁰³ En las siguientes semanas volvería, en gran medida, a la primera línea mediática anunciando los parabienes de la economía española y anunciando la luz al final del túnel. Noticia, Fernando Jáuregui, “Discrepancias en el Gobierno ante el deseo de Boyer de centrar el debate sobre «el estado de la nación» en los aspectos económicos”, *El País*, 17 de octubre de 1984; Noticia, “Miguel Boyer reafirma la recuperación de la actividad económica”, *El País*, 18 de octubre de 1984”.

la CEPYME firmante también del acuerdo—. José María Cuevas que en el transcurso de las negociaciones se había arrogado la paternidad de la “concertación social” —en un sobresalto de egolatría— declararía que la CEOE no asumía la política económica del Gobierno, “que mantiene su total responsabilidad. Seguiremos analizando y criticando [...] cualquier desviación de esa política”. Y en cuanto al tema de la flexibilidad del mercado de trabajo dejaría apuntado: “El Gobierno ha mostrado su voluntad de adecuarse a la legislación comunitaria. Después del plazo de seis meses, toda la responsabilidad corresponde al Gobierno y a su presidente”. Advirtiéndolo seriamente: “Si no cumple con su responsabilidad no denunciaremos el acuerdo, pero diremos a la opinión pública que no se cumple el compromiso”. Una forma diplomática de amenazar sabiendo que la correlación de fuerzas en el Congreso y el Senado invalidaban, de entrada, cualquier otra posibilidad de ir más allá. Por parte de UGT, Redondo, en unas declaraciones sumamente medidas como vacías de contenido hablaría en los siguientes términos: “[El AES es] mucho más ambicioso y más completo que otros alcanzados en el pasado”. Mientras que Corcuera y Zufiaur saldrían al paso de las declaraciones de la patronal, indicando con ironía que era “de agradecer que alguien como el presidente de la CEOE reconociera que estamos equiparados en flexibilidad de contratación en Europa”³⁰⁴.

En la misma crónica laboral de *ABC* acerca de la firma del AES, se iba un paso por delante de *El País*, en relación a los planes gubernamentales en relación al desarrollo del acuerdo social. Se informaba, por ejemplo, de cómo la “reforma de la Seguridad Social se acometerá tras el estudio de una Comisión que se formará con representantes de las partes firmantes en el plazo de quince días a partir de ayer”. Con la vista puesta a un plazo máximo de tres meses, también se informaba de cómo desde el Gobierno se “tiene ya elaborado un proyecto de reforma, según manifestó el Ministro de Trabajo, y deberá después tomar su decisión sobre esta reforma que sería aplicada, según Almunia, en el plazo de dos o tres años”. Un anuncio inquietante en tanto en cuanto se conocía la disposición del liberal del Gabinete al respecto, y más que cerrar problemas los abría. Hecho que confirmaría el teórico padre de la concertación española al afirmar en aquellas fechas como la “negociación no ha terminado”. No erraba³⁰⁵.

Incluso comedido se mostraría el editorial de turno de *El País* frente a la firma del AES, que a lo más que llegaba era a calificar de “éxito” el cierre del proceso negociador, a la par que alabar la “decisiva intervención del presidente del Gobierno”. En un editorial escrito casi, a buen seguro, por Joaquín Estefanía³⁰⁶, se limitaba, por lo demás, a describir lo acordado sin mayores detalles ni interpretaciones. No obstante, si se aprovecharían aquellas líneas para advertir, por un lado, de los riesgos de la ausencia de Comisiones Obreras en la más que abierta posibilidad de que surgieran “considerables dificultades a la hora de aplicar los acuerdos y de lograr su validez”, para también indicar que la “dura réplica del presidente del Gobierno a las críticas formuladas por Marcelino Camacho tampoco han estado a la altura de lo que debería exigirse a un debate civilizado”; y finalmente, y tras tachar a CCOO de demagógica y reducir su oposición a una mera maniobra política ligada al PCE —argumento que era empleado un día y otro también por el Presidente del Gobierno—; se volvía a felicitar por la victoria del Ejecutivo por haber conseguido “desenganchar a la CEOE de la dirección política de Alianza Popular” —lo que era mucho *suponer* en cualquier caso—. Terminaría indicando cual era en su opinión el

³⁰⁴ Noticia, Rodolfo Serrano, “El presidente del Gobierno y los máximos responsables de la patronal y UGT firman el pacto social”, *El País*, 10 de octubre de 1984; Noticia, Amancio Fernández, “El Gobierno deberá acometer a partir de ahora las reformas acordadas en el AES”, *ABC*, 10 de octubre de 1984.

³⁰⁵ Noticia, Amancio Fernández, “El Gobierno deberá acometer a partir de ahora las reformas acordadas en el AES”, *ABC*, 10 de octubre de 1984.

³⁰⁶ Basamos esta hipótesis en la repetición de argumentos similares cuando no repetidos expuestos en su siguiente obra: ESTEFANÍA, Joaquín, “Teoría de los pactos sociales” en id., *La larga marcha...*, *op.cit.*.

principal escollo que debería afrontar el AES: “La homologación de nuestra legislación laboral con la normativa europea, único compromiso del Gobierno, es una exigencia inevitable de nuestra incorporación a la CE, donde, por lo demás, no existe ese fantasmal despido libre”. Más claro no se podía decir en tan sólo tres líneas³⁰⁷.

A través de dos principales vías se iniciaría una nueva *oleada reformista*, de forma casi inmediata, tras la firma del AES. Un reformismo siempre de carácter liberal, y que tendía a cuestionar todos y cada uno de los derechos conquistados por el movimiento obrero en aras de la denominada “eficacia económica”. La lógica intrínseca y la utilidad dada al AES cada vez aparecían más visibles. De esta forma, a menos de una semana de que se cumplieran los plazos para la constitución de la Comisión del AES sobre la reforma de la Seguridad Social, Almunia volvía a la carga en su ya probado *ímpetu reformista*. En rueda de prensa para la presentación de los presupuestos de la Seguridad Social –calificados de “enorme esfuerzo de mejora de gestión”– se insistía en la tesis –desde un Gobierno progresista– de que las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social no dejan de ser un “impuestos sobre el empleo”, y que, por tanto, las mismas debían rebajarse presumiblemente. Lo que a su vez –siguiendo la lógica progresista socialista consabida– conllevaría a una reducción de la cuantía de las prestaciones para garantizar la “viabilidad” –palabras mágica dentro del diccionario liberal– aunque, por otro lado, no se aseguraría la revalorización automática según el IPC de todas las pensiones³⁰⁸.

De nuevo, la lógica misma sufría otro virulento ataque. Especialmente, cuando ya se demostró los muy bajos niveles en gasto social y concretamente en Seguridad Social, que caracterizaron durante estas años al insuficiente Estado del Bienestar en España³⁰⁹. Y en ese mismo contexto es donde se anunciaría como se pretendía ingresar 134.000 millones y a su vez reducir los gastos en más de de sesenta y mil millones de pesetas³¹⁰.

En esta coyuntura, se constituiría a una velocidad inusual la Comisión Tripartita para la reforma de la Seguridad Social prevista en el artículo 13 del AES el lunes 22 de octubre, inclusive antes de cumplirse los quince días de plazo que se habían dado las partes. Aunque para la publicación en el BOE de la Ley 26/1985 todavía pasarían más de nueve meses y del Real Decreto 1799/1985 que desarrollaba la anterior normativa casi un año³¹¹, la estrategia a seguir era clara: acelerar al máximo los tiempos por parte del Gobierno pero también de la CEOE –sabedoras de la excelente correlación de fuerzas en el aquel otoño-invierno de 1984– con el *silencio cómplice* de UGT –que cada vez estaba más aislada– de cara a que los recursos y denuncias interpuestas por CCOO solicitando su participación llegarán tan tarde, que la Comisión Tripartita ya hubiera finalizado sus trabajos³¹².

Mientras esto sucedía, la otra gran *batalla* llevada a cabo por la CEOE al respecto de las cotizaciones quedaría silenciada tras redactarse y aprobarse el muy significativo artículo 11 del AES, en donde se remarcaba el “compromiso asumido por el Gobierno en orden a reducir la participación de las cotizaciones de la Seguridad en los costes laborales de las empresas”. Por el Real Decreto 1/1985 del Ministerio de Seguridad Social, el Gobierno cumpliría

³⁰⁷ Editorial, “La firma del AES”, *El País*, 10 de octubre de 1984.

³⁰⁸ Portada, “La reforma de la Seguridad Social se llevará a cabo en 1985”, *El País*, 17 de octubre de 1985; Noticia, “Las previsiones de gastos e ingresos en el próximo año, abiertas a la posible reforma de pensiones y tipos de cotización”, *El País*, 17 de octubre de 1984.

³⁰⁹ Véase lo apuntado al final de la *nota* 295.

³¹⁰ Noticia, “La mejora de la gestión permitirá 134.000 millones más”, *El País*, 17 de octubre de 1984.

³¹¹ Ley 26/1985, de 31 de julio, *de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y acción protectora de la Seguridad Social*; Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre, *para la aplicación de la Ley 26/1985, de 31 de julio en la materia de racionalización de jubilación e invalidez permanente*.

³¹² Noticia, “Constituida la comisión de reforma de la Seguridad Social”, *El País*, 23 de octubre de 1984.

escrupulosamente lo acordado en el AES, a la par que en el artículo 23 se establecían las bases de cotización correspondientes al Fondo de Solidaridad para el Empleo, en el que el empresario tendría que aportar 0,28 puntos pero que estaban sobradamente compensados en relación a la reducción de las cotizaciones sociales que pasaban del 29,10% al 28,80%.³¹³ Dicho en otras palabras, todo quedaría exactamente igual antes y después del AES para los empleadores.

Decíamos en líneas anteriores que la correlación de fuerzas era claramente favorable en aquella coyuntura para la patronal. Una *correlación* apoyada por todas y cada uno de los datos que hablaban del buen ritmo de crecimiento del sector privado. Si en agosto se conocían sendos informes del Banco Bilbao y del Ministerio de Economía, en octubre se publicarían el de la Central de Balances del Banco de España –en base a 1.840 empresas–. Los datos hablaban por sí solos. En tan sólo un año se había pasado de 59.000 millones de pérdidas a unos 49.000 millones de ganancias. A pesar del retroceso alarmante de las empresas públicas –60.000 nuevos millones de pérdidas– el sector privado había pasado de ganar 49.000 millones a 117.000 millones de pesetas. Se trataba, en suma, de un crecimiento del 148%. Entre las razones expuestas, entre otras, destacaba como tal crecimiento había sido posible “por el menor peso de los gastos de personal ya que en las empresas privadas éstos han disminuido sobre el total de ventas –del 18,7% al 18,2%– mientras que en las públicas aumentaron, aunque ligeramente”. Prácticamente no había un dato negativo en aquel informe: desde la mejora en la capacidad de autofinanciación al incremento de la plantilla vía contratación temporal... indicaban que, al menos, a las empresas españolas privadas les iba bastante bien³¹⁴. No obstante, la pregunta era otra: ¿Habría llegado la hora de invertir?

Tras unos días de una muy relativa tranquilidad, a mediados de octubre, la CEOE volvería a la carga en relación al desarrollo del artículo 17 y 18 del AES. Se abría así el segundo frente reformista-liberal del pacto social, con la vista también puesta en el desarrollo legislativo de la RET’84 contemplado en el artículo 15 del mismo Acuerdo Económico y Social. De esta forma, la CEOE iba a introducir un nuevo elemento en el debate político-económico antes que jurídico, al reforzar su argumentación en base a la cláusula número 5 de la directiva de 1975 de la CEE³¹⁵.

A la par que esto sucedía, tan sólo desde la UGT convertida en el único agente que defendía –y no plenamente– las virtudes del AES, se optaría por una clara actitud defensiva negando la posibilidad de que el Gobierno fuera a ceder en este terreno³¹⁶. Por ejemplo, en las páginas de *Unión* en los dos números correspondientes a octubre y a la primera quincena de noviembre, sus titulares no transmitirían un entusiasmo desmedido al respecto: “Para seguir luchando” –número 58, 1 quincena de octubre– “En síntesis: un buen acuerdo” –número 59, segunda quincena de octubre– y “Cumplir el acuerdo. Con talante solidario” –número 60, primera quincena de noviembre–. En realidad, se trataba de unos tiempos en donde la UGT

³¹³ Real Decreto 1/1985, de 5 de enero, *sobre cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Fondo de Solidaridad para el Empleo en 1985* [B.O.E. 7 de enero de 1985]; y, Orden de 15 de enero de 1984, *por la que se desarrolla el Real Decreto 1/1985, de 5 de enero, sobre cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Fondo de Solidaridad para el Empleo en 1985* [B.O.E. 24 de enero de 1985].

³¹⁴ Noticia, Salvador Arancibia, “Las empresas privadas aumentaron sus beneficios en 1983 hasta 117.000 millones de pesetas”, *El País*, 23 de octubre de 1984.

³¹⁵ Véase aquí al respecto el clarificar análisis de, ARAGÓN, Jorge, “El despido colectivo y el AES”, *Gaceta Sindical*, nº 33, (1984), pp. 7-8, quien concluía con la hipótesis de que todo dependería de la *voluntad política* del Gobierno, pero también de la «posible existencia de compromisos políticos del Presidente del Gobierno sobre esta materia, según afirman los representantes de la patronal».

³¹⁶ En una iniciativa cuando menos singular y dirigida a mejorar la imagen de UGT –de hecho, la iniciativa partiría desde la Secretaria Confederal de Imagen de la UGT– Redondo, Corcuera, Saracíbar y Manuel Simón se reunirían con los agregados laborales de las embajadas de Estados Unidos, República Federal de Alemania, Reino Unido y Francia, para explicarles los objetivos y naturaleza del AES. Noticia, “UGT explicará el pacto social a EEUU, Reino Unido, Francia y RFA”, *El País*, 23 de octubre de 1984.

tenía más que suficiente con *negar* que se hubiera pactado con el Gobierno y la patronal el despido libre. Redondo, así, continuaría su campaña de desvío de atención a la par que de (auto)victimismo:

«Es esta una curiosa polémica que tiene un cierto cariz paradójico porque resulta que tanto el Gobierno como la CEOE niegan totalmente que esté dentro de las posibilidades su implantación y, desde luego, para nada se refiere a él el artículo 17 del Acuerdo. ¿Dónde está, pues, el ‘despido libre’? ¿Sólo en la imaginación de algunos? ¿Es nada más que un arma dialéctica para atacar a UGT?».

Lo anterior procedía de un largo artículo de opinión del Secretario General de UGT en las páginas de *Unión* en el número 58, al que se acompañaba para despejar dudas el tantas veces citado “Documento del Consejo de las Comunidades Europeas”, de 17 de febrero de 1975, sumado a un texto del Gabinete Confederal Jurídico cuyo título no dejaba lugar a muchas dudas: “Mienten y lo saben. ¿Por qué confundir a los trabajadores?”. Incluyéndose, asimismo, el texto íntegro del AES y la propia Declaración del Gobierno al respecto³¹⁷. Ya en el siguiente número –dentro de una campaña un tanto descafeinada en defensa del AES– se publicaría en el órgano de expresión de la CEC de UGT, un mural explicativo que bajo el título “En síntesis: un buen acuerdo”, se le acompañaba de otros dos artículos de opinión negando que el AES tuviera relación alguna con el despido libre³¹⁸. Una acuciante campaña de información tanto o más relevante de la necesidad de salir al paso de cada vez más severas críticas.

Por otro lado, en público, miembros de la Ejecutiva como Corcuera –hombre siempre bien informado desde altas instancias gubernamentales– avanzado el mes de octubre llegaría a declarar que la UGT “no hubiese suscrito un acuerdo en el que se pudiera deducir el despido libre”. Una posición que, en cualquier caso, no era compartida por todos los miembros de la dirección de la central ugetista, empezando por Justo Fernández quien afirmaría también en aquellas semanas la tesis contraria³¹⁹. Mientras que el Gobierno guardaba un silencio llamativo –interpretable de diferentes maneras según a quien o quienes se recurriera– la CEOE no frenaría la escalada de declaraciones³²⁰.

En esta constante escalada de exposición de diferentes pareceres, José María Cuevas a dos semanas de firmarse el AES, concretamente el 25 de octubre, realizaría unas declaraciones harto comprometidas para el propio Gobierno, dejando caer que nunca la CEOE había obtenido tantas cesiones como con el Ejecutivo de González: “He consultado con otras personas que fueron presidentes del Gobierno y me han dicho que en la vida firmarían esa legislación”. Declaraciones que tenían lugar en el muy selecto Club Liberal de Madrid. Aunque también dejaría patentes otras dos *ideas-fuerza*. La primera, que el AES no significaba apoyar la política económica del Gobierno: “El AES [...] no puede servir para que el presidente del Gobierno pueda decir que la política económica está pactada y aceptada por empresarios y sindicatos. Sólo el Gobierno es responsable de la misma”. En segundo término, volvería a demostrar su total desconfianza sobre el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno, mediante un recurso de signo populista: “[E]l contribuyente recela de un Gobierno que desembarca con un programa y una ideología determinada y, sin embargo, se esfuerza por no aplicar ninguna de las dos”³²¹. Por

³¹⁷ REDONDO, Nicolás, “Para seguir luchando” (pp. 1-3), “Documento del Consejo de las Comunidades Europeas” (p. 4), “Mienten y lo saben” (pp. 5-6), todos ellos en *Unión*, nº 58, (1984).

³¹⁸ “En síntesis: un buen acuerdo. AES: Desde la responsabilidad y la coherencia” (pp. 1, 3-5); SANTILLÁN, Sergio y CALVET, Enrique, “Realidades por encima de demagogias”, ambos en *Unión*, nº 59, (1984).

³¹⁹ Noticia, “Divergencias en UGT sobre la eficacia del acuerdo económico y social”, *El País*, 22 de octubre de 1984.

³²⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “La CEOE insiste en que el AES cambiará la legislación laboral y se dará mayor facilidad de despido”, *El País*, 16 de octubre de 1984.

³²¹ Noticia, “Otros presidentes del Gobierno no habrían firmado las normas de contratación laboral, según Cuevas”, *El País*, 26 de octubre de 1984. Véase también, Noticia, R. S. [Rodolfo Serrano], “El

cierto en aquellos mismos días en *Diario 16*, afirmaría como todavía faltaban “muchas cosas para que se pueda invertir en España”³²².

12.3.2. La «Operación AES». Los frentes se multiplican: de la campaña de *El País* –bajo guión de Rodolfo Serrano– al Juzgado de Guardia

«No hay duda de que el movimiento obrero español y el de otros países ha confundido muchas veces lo personal con lo político y ha cerrado filas rehuendo la reflexión crítica. Esto vale tanto para los partidos políticos cuanto para las organizaciones sindicales. Más lo de doblegarse ante las exigencias del poder se aplica menos a CCOO y al PCE, que a UGT y al PSOE, por ejemplo. El poder (o lo que parece serlo, pero, si no lo es, es encubridor del otro) cambió redondamente su programa económico, su política interior y su política internacional, y su partido ni rechista caso [...]. Y ni en UGT ni en el PSOE ha pasado nada digno de mención; se ha doblegado ante el poder prácticamente todo el mundo. En cambio, cuando todavía era un partido, los comunistas, tan pobres en pluralismo prosódico, tenían a veces la vergüenza de escindirse en circunstancias parecidas, en vez de doblegarse ante el poder».

Manuel SACRISTÁN³²³.

La *gran* ausente del AES iba a adquirir un protagonismo tal, que dejaría, en la práctica, en un lugar secundario, a nivel informativo y político, el desarrollo normativo del citado acuerdo social durante buena parte del mes de octubre. El primer episodio en mayúsculas de la larga resaca del AES se centraría, justamente, en la campaña frente a Comisiones Obreras y, de forma concreta, contra Marcelino Camacho. Todo ello en una batalla –o mejor dicho, *guerra*– de mayor alcance y que tenía por fin último la *necesaria derrota* del sindicato de mayoría comunista, como una condición necesaria para el efectivo desarrollo del proyecto de modernización socialista.

Al día siguiente de recibir la carta de Felipe González contestando a la precia de Camacho, desde la Comisión Ejecutiva de CCOO un martes 9 de octubre se aprobaba una dura resolución contra el Presidente, a la par que se decidiría iniciar una campaña contra el AES. Considerado como un “inclasificable ataque personal” el telegrama de González, la *resolución* de la Ejecutiva, salía al paso de las acusaciones indicando como desde la Presidencia del Gobierno se calla “ante las declaraciones de cualificados portavoces de CEOE, que confirman el compromiso de libertad para el despido colectivo”. No terminaba ahí, pues tras advertir el alto grado de “degradación” personal que constituía dicha respuesta, se indicaba la más que clara “coincidencia Gobierno-CEOE, para intentar consolidar la política derechista en materia económica y social que viene siguiendo”, lo que había llevado, a su vez, a Felipe González a lanzar “furibundos ataques a CCOO”. “Ni con insultos personales a quien simboliza una forma de lucha de los trabajadores, ni ataques a organizaciones democráticas, baluartes en la lucha contra el franquismo y la consolidación de las libertades en España, van a solucionarse los problemas de nuestra patria”, se remarcaría. Recordando, por lo demás, las declaraciones del mismo González acerca de las virtudes del capitalismo –“es el menos malo de los sistemas”–

Gobierno es el único que asume compromisos en el AES para fomentar la inversión y crear empleo, según la patronal CEOE”, *El País*, 30 de octubre de 1984.

³²² Cita recogida en, SARTORIUS, Nicolás, “¿Por qué no al AES?”, *El País*, 25 de octubre de 1984.

³²³ SACRISTÁN, Manuel, “Nota”, *Mientras Tanto*, nº 21, (1984), pp. 16-19.

terminaba aquella misiva advirtiéndole de la falta de credibilidad del propio Presidente para hablar de verdades y de compromisos³²⁴.

Ni una línea se había movido Comisiones Obreras de su posición desde que se iniciarán las negociaciones del AES, con o sin reuniones secretas, con o sin “comisiones restringidas”. ¿Podría volver a hacer reproducir el ciclo conflictivo del primer trimestre de 1984 una nueva escalada de movilizaciones comandadas por CCOO? Difícil respuesta. Lo único cierto es que sin su participación en la parte interconfederal del AES, se abría la posibilidad de caminar hacia un nuevo proceso de negociación colectiva, convenio por convenio, en un escenario de inestabilidad y crisis económica.

Es en esta precisa situación de correlación de fuerzas, el que de forma paulatina se iniciaría la campaña contra el Comisiones Obreras. Todo ello como parte de la estrategia más global ya advertida. Así el mismo día en que CCOO daba a conocer su comunicado en relación a la contestación del telegrama de González a Camacho, desde la dirección del PSOE se publicaría a su vez otro contundente comunicado contra el sindicato de mayoría comunista, en donde se les acusaba de “dejación de sus responsabilidades sindicales”, y de subordinar los “intereses de los trabajadores a los del Partido Comunista”. Un argumento, por cierto, que sería empleado por el TOP para ilegalizar a CCOO en febrero de 1967³²⁵.

“Lamento sinceramente que CCOO no suscriba este acuerdo y estoy convencido de que su contenido podría haberse enriquecido si hubiéramos contando con vuestra activa participación en la negociación”, se podía leer en la carta que Nicolás Redondo enviaría el jueves 11 en contestación a la de Camacho del día 5. Sin grandes dosis de entusiasmo también en aquella carta se decía: “[C]onsideramos que este acuerdo supera en extensión y profundidad todos los anteriores [...] que constituye una respuesta solidaria a la crisis en la que estamos inmersos”. Para a continuación señalar como el AES, ante todo, serviría para garantizar la *paz social*: [El AES] permitirá una negociación colectiva fluida sin agravar las tensiones que los múltiples problemas por los que atraviesa nuestra sociedad”. Todavía más, pues en un inusual tono conciliador empleado en aquella ocasión por Redondo –quien no dudaría en *engañar* a Camacho un par de meses antes al respecto de las negociaciones secretas del mismo AES– pedía que tal desencuentro “no deben llevarnos a cortar las vías de comunicación”. Más aún pues tras afirmar su “preocupación por nuestra responsabilidad ante los trabajadores a los que ofrecemos a menudo agrios enfrentamientos en vez de soluciones armónicas establecidas a sus acuciantes problemas”, se dejaba una puerta entreabierta a la participación de las propias Comisiones Obreras en las comisiones del AES:

«No es deseable, en cualquier caso, que una organización representativa pueda quedar en una situación de alejamiento de un Acuerdo que será protagonista en los dos próximos años y que tanta influencia ejercerá sobre el conjunto de la clase trabajadora y sobre los propios filiados a tu Confederación»³²⁶.

Lo anterior, no sería era óbice para que en público pero sobre todo de cara a los afiliados y militantes ugetistas, no se dejaría de acusar, por activa o por pasiva, a Comisiones Obreras de no pocos de los *males* del AES. Manteniendo además –tal y como se repetiría desde el Gobierno, el PSOE y *El País*– que CCOO se había auto-excluido³²⁷.

³²⁴ AHT, CCOO-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal del día 9-X-1984”, sig. 001-00047, en donde se incluye la citada *resolución*. Noticia, “CCOO acusa a Felipe González de realizar ataques personales”, *El País*, 10 de octubre de 1984.

³²⁵ Véanse también las declaraciones del responsable económico del PCE. Noticia, “El AES consagra una política económica conservadora, según Nicolás Sartorius”, *El País*, 12 de octubre de 1984.

³²⁶ AHFFLC, UGT-CEC, “Carta de Nicolás Redondo –Secretario General de UGT– a Marcelino Camacho –Secretario General de CCOO–. Madrid, 11 de octubre de 1984”, sig. AI 46-04, dentro del Fondo de Secretaria de Acción Sindical. Noticia, “El secretario general de UGT lamenta la ausencia de CCOO en el pacto social”, *El País*, 12 de octubre de 1984.

³²⁷ REDONDO, Nicolás, “Para seguir luchando”, *Unión*, nº 58, (1984), pp. 2-3.

A finales de la segunda mitad de octubre de 1984, Rodolfo Serrano publicaba un amplio reportaje en la edición dominical de *El País*, acerca de las dificultades por las que atravesaba el AES. El día elegido y el formato no eran casuales. Bajo esa misma apariencia en el momento en que se descendía en su lectura lo que allí se trataba era un reportaje con no pocos dosis de artículo de opinión, dedicadas casi en exclusiva a las Comisiones Obreras. Un primer aviso de lo que vendría tan sólo unos días después. Un texto que contenía expresiones del siguiente tenor: “Si CCOO ha anunciado su beligerancia contra el acuerdo, a su vez, puede verse abocado a una progresiva radicalización y marginación”. Descargando de responsabilidades a UGT y a la CEOE en la *vigilancia* del AES, indicaba como el “AES ni siquiera garantiza una cierta paz laboral”, ante el “descuelgue de CCOO”. En honor a la verdad se decía como el “proceso de negociación seguido en este acuerdo no parece ahora que haya sido el más adecuado”, ante el continuado secretismo seguido. Lo que no casaba tanto es que se dijera como la “excusa final para retirarse de las negociaciones fue el sistema de reuniones secretas”. Una afirmación totalmente falsa, pues CCOO no se había retirado en ningún momento, como por cierto se ha sostenido desde entonces³²⁸.

A partir de ahí, de su *propia cosecha*, Rodolfo Serrano, venía a formular un conjunto de hipótesis de futuro, que mal casaban no sólo con la actitud pública adoptada por CCOO, sino ante todo con las votaciones habidas en sus diferentes órganos de Gobierno: “La actitud del Gobierno aumenta el crédito de los sectores de CCOO más radicalizados y agudiza las dificultades –por otra parte sobradamente conocidas– del sindicato para llegar al acuerdo”. Por estos tortuosos senderos, empezaba lo que hemos denominado como la construcción del “problema de CCOO”, ante su más que segura oposición al AES y su más que probable posición de fuerza que mostraría ante el siguiente proceso de negociación colectiva³²⁹.

Junto alguna que otra pequeña filtración interesada en los días siguientes, durante el 18, 19 y 20 de octubre *El País* llevaría de la mano del propio Rodolfo Serrano a sus portadas las supuestas divisiones internas de CCOO así como los intentos de relevar a Camacho. La construcción del “problema de CCOO” cobraba forma y contenido. En una campaña que, como ya se ha indicado, tenía sus constataos precedentes –e inclusive se había intentado llevar a cabo en medio de las negociaciones del AES sin el menor de los éxitos– y que tendría sus posteriores ramificaciones –sin ir más lejos contra el mismo Nicolás Redondo años más tarde, cuando la familia socialista se había fracturado y no casualmente el AES había expirado su vigencia³³⁰– en esta ocasión no faltará ningún elemento.

Serrano, periodista acostumbrado a revestir sus noticias y crónicas con cierto halo de misterio más propio de una novela policiaca que de una crónica laboral, trataría en aquellos días de elaborar –con el apoyo de *El País* y el más que seguro beneplácito del Gobierno, junto con el *silencio*, nuevamente, *cómplice* de UGT– toda una campaña de intoxicación en donde no faltarían todos y cada uno de los elementos para un guión de cine: delaciones, traiciones, intrigas, movimientos en la sombra..., lo que sin duda mejoraría considerablemente los pobres argumentos mantenidos en otras ocasiones. Un conjunto de noticias que iban muchísimo más allá del mero interés informativo. La parte *oculta* de la “Operación del AES” –empleando aquí una acertada expresión de Julián Ariza– se ponía en marcha ya sin ningún tipo de titubeos.

³²⁸ El ejemplo más acabado al respecto resulta, sin ningún género de dudas, la explicación dada por Joaquín Estefanía. Uno de los periodistas mejor informados entonces, y quien volvería a insistir mucho tiempo después en la tesis *seudo-oficiosa* de la ‘automarginación de CCOO’. ESTEFANÍA, Joaquín, “Teoría de los pactos sociales” en id. *La larga marcha...*, *op.cit.*. De hecho, llegaría a afirmar literalmente lo siguiente: «CCOO no aceptará participar en lo que será el AES. Camacho justificara la ausencia de su sindicato con que la firma hubiese constituido un aval de la política económica de Boyer, basada en el rigor y en el ajuste». *Ibidem*, p. 235. Véase, por lo apuntado previamente al respecto en la *nota 142*.

³²⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El difícil acuerdo del AES”, *El País*, 14 de octubre de 1984.

³³⁰ Véase lo apuntado en la *nota 142*.

Una *operación* que se prolongaría durante los siguientes meses y que vistos sus resultados con la distancia que proporciona el paso del tiempo, puede calificarse de exitosa. No sólo por desviar la atención en un momento en que la credibilidad del AES era prácticamente nula, sino por desactivar los posibles llamados a una movilización que condujeran a un potencial escenario de paro general, al obligar a Comisiones Obreras a centrar buena parte de sus recursos y energías en desmentir, uno por uno, los argumentos de *El País*. Exitosa, ya que la posibilidad de que Camacho fuera relevado, que Comisiones Obreras se radicalizara o directamente se fracturar no eran posibles ni imaginables en aquellas mismas circunstancias. Es decir, la elaboración mediática y sus argumentos “políticos” *ad hoc* al respecto de la situación interna de Comisiones Obreras resultarían, a la postre, tan sólo una “cortina de humo”. La mejor prueba es que nadie cualificado, ya fuera militante o dirigente, saldría a la prensa refutando las hipótesis de *El País* y por extensión de Rodolfo Serrano, siempre basadas en “fuentes cualificadas” pero sin aportar ningún nombre de peso, ni ningún dato relevante ni ningún acontecimiento significativo.

“Sectoros de Comisiones Obreras plantean el relevo de Camacho” sería el principal titular de *El País* el jueves 18 de octubre de 1984. La noticia firmada por Rodolfo Serrano, se elaboraría en base a la fuente de información bajo el siguiente rótulo: “sectores con gran responsabilidad –cualitativa y cuantitativamente significativos– dentro del aparato de la central sindical”. *Sectores*, quienes además “han exigido anonimato para evitar tensiones personales con el propio Camacho”. Una nota en donde no aparecía ninguna contrastación ni con el principal interesado ni con ninguna voz “oficialista”, por más que las mismas no hubieran faltado en anteriores ocasiones para recabar sus opiniones cuando se había estimado oportuno. Lo que aquella *primicia* venía a esbozar era como determinados sectores de CCOO se “plantean la necesidad de que Marcelino Camacho [...] pase a ocupar áreas no ejecutivas dentro de la organización en línea con los deseos que él mismo ha expresado en distintas ocasiones”. Ciertamente, pues el mismo Marcelino no sólo lo dejaría caer en más de una ocasión, sino que lo confirmaría a posteriori en sus *Memorias* en donde señalaría que no terminaría de tomar dicha decisión ante el panorama conflictivo en el que se desarrollaría el III Congreso Confederal³³¹.

¿Cuáles eran las razones de dicho como supuesto *movimiento* dentro de Comisiones Obreras? La primera, la “práctica automarginación de CCOO de las negociaciones del AES”. ¿Automarginación? Un concepto sin duda cuestionable. Pero lo cierto es que la forma de proceder había sido respaldada, recuérdese, en todos y cada uno de los CS, CEC y SC con votaciones, prácticamente, unánimes. La segunda, “las valoraciones absolutamente negativas del acuerdo sin ofrecer alternativa alguna –excepto las tradicionales movilizaciones obreras–”. Un argumento que por sí mismo *calificaba* –o mejor dicho descalificaba– a las fuentes empleadas, en tanto lo que no faltaría, en momento alguno, por parte de Comisiones Obreras serían propuestas y más concretamente su programa económico titulado: “Política de Solidaridad contra el Paro y la Crisis”. La tercera razón –lo que se califica como las “razones más profundas”– la no aplicación de las oportunas tesis congresuales del verano. Aquí ciertamente a Comisiones Obreras, tal y como se ha explicado, tras arrinconarla entre la *espada* y la *pared*, decidiría no renunciar a su presencia en la mesa de negociación pública y oficial en consonancia con las citadas tesis. El cuarto argumento –quizás el más elaborado– partía de la utilización entre comillas de las supuestas declaraciones de las fuentes anónimas. Exactamente en la “crónica” se decía: “El debate se plantea en torno a si CCOO debe defender una política de resistencia «frente a la agresión del Gobierno» o si siendo consecuentes con su política de solidaridad no debe profundizar en la vía de ofrecer alternativas realistas y «por encima de las demagogias obreristas» a la crisis y al paro”. Si ya resultaba sospechoso que miembros cualificados de CCOO hablarán de *demagogias obreristas*, todavía más inverosímil parecía indicar que se “trataría de aportar una ideología al sindicato de la que hasta ahora ha carecido al estar excesivamente dependiente de la figura carismática de Marcelino Camacho”. Un argumento del todo débil, pues si por algo se caracterizarían las Comisiones Obreras desde su

³³¹ Véase la nota 96.

origen sería por ser uno de los precursores como impulsores del *socialismo democrático* tanto dentro como fuera del mundo del trabajo. Para rematar el argumento se añadía: “Para estos medios, Marcelino Camacho debe jugar cada vez más un papel moderador, por encima de rivalidades internas y no intervenir tan activamente en el día a día sindical”.

Todo aquel argumentario –en donde tal sólo faltaría incluir la *idea-fuerza* de que CCOO dependía del PCE– se completaba con el recuerdo vivo de cómo había transcurrido el III Congreso Confederal de junio, sumado al enfrentamiento de Camacho con Ariza, que ahora ya estaba superado. A lo anterior, en todo caso, se sumaba un elemento novedoso: “Ni por qué Marcelino Camacho, en contra de su costumbre, llegó a pedir en un Consejo Confederal que aprobaran unánimemente su informe y las resoluciones sobre el AES, argumentó que existía un cerco de la prensa [concretamente de *El País*] hacia el sindicato y que la situación política aconsejaba aparecer «unidos como una piña», tal y como hemos podido ver a través de una explicación más detallada como sosegada.

No terminaba ahí, pues en la supuesta operación abierta para *derribar* a Camacho se constataba las dificultades de buscar una “alternativa”. *Alternativas* que pasaban por “llevarse a cabo mediante la negociación colectiva directa o, en último extremo con la celebración de un Congreso extraordinario, del que CCOO podría salir fortalecida o partida en dos”. El *viejo fantasma* de la división de Comisiones Obreras recobraba así una expectante fuerza.

Para completar definitivamente aquel sombrío cuadro, el mismo Rodolfo Serrano utilizando en aquella también ocasión “fuentes cualificadas de CCOO”, hacía referencia a una conversación telefónica del día 10 de octubre entre Camacho y López Bulla –Secretario General de la CONC–. “Su intención [la de López Bulla] es renunciar a todos los cargos confederales, en protesta por la forma en que este sindicato ha abordado la política de pactos sociales”. Ahora bien se aclaraba lo siguiente: “Sin embargo, López Bulla –que reitero su postura absolutamente contraria al AES– desmintió rotundamente que hubiera existido intento alguno de dimisión del secretario confederal, del que él es vocal”. Así pues, en lo que se calificaba como un “[movimiento] sin vinculación aparente” se cernía más sombras: división, traiciones.... No obstante, en el mismo interior de la noticia, se recogían unas declaraciones del propio López Bulla negando la mayor, a la par que se dejaba bien claro que el mismo “jamás cuestionaría el papel del actual secretario general”. La propuesta de intriga, así, quedaba un tanto descafeinada³³².

La segunda pata de la campaña de *El País* giraría en torno a la publicación aquel mismo jueves 18 de octubre del artículo del “afiliado” a Comisiones Obreras, Carlos Navales, quien criticaría abiertamente la posición de su sindicato frente al proceso negociador del AES, refutando así en parte las *ideas-fuerzas* sostenidas desde el mismo periódico contra CCOO. El segundo elemento del argumentario, la división, entraba en escena. Un *afiliado* con un peso cualitativo considerablemente durante la dictadura en el sector de la construcción, en tanto llegaría a ser Secretario General de la Federación del Baix Llobregat y miembro de la dirección de la CONC³³³. Es decir, se trataba de un muy *relativo* afiliado.

“Sin embargo, es más difícil comprender los motivos que han impulsado a Comisiones Obreras (CCOO), existiendo la preocupación de que su análisis no sea todo lo sindical que debiera”, afirmaba el propio Navales dejando entrever que entre las razones de CCOO para rechazar el AES existía una motivación política. “Una lectura tranquila del AES nos advierte de inmediato sobre su mayor amplitud de contenidos socioeconómicos respecto a anteriores pactos y acuerdos”, continuaba su argumentación, aunque evitara, precisamente, entrar en los asuntos

³³² Portada, “Sectores de Comisiones Obreras plantean el relevo de Camacho”, *El País*, 18 de octubre de 1984; Noticia, “La falta de alternativas al AES provoca un movimiento para relevar a Camacho de las tareas ejecutivas en CCOO”, *El País*, 18 de octubre de 1984.

³³³ El mismo Carlos Navales (1952-2011) escribiría su propia autobiografía, aunque finalizaba la misma en el proceso de la transición a la democracia. Consultable en: <http://www.memoria-antifranquista.com/bios/carlesnavales.htm>.

más espinosos del acuerdo social como el “polémico tema del *despido libre*”. Visto así, y teniendo presente que “España cuenta con un Gobierno socialista, pero también con unos poderes fácticos prácticamente intactos”, no llegaba a comprender las razones del rechazo. “El AES sirve, y bastante, para avanzar”, refiriéndose a un conjunto de temas que iban desde el empleo a la presencia sindical en los centros de trabajo. “Creo sinceramente que, aun siendo críticos con el AES, nada impedía a CCOO firmar su título segundo (negociación colectiva) y en su título primero (acuerdos tripartitos) firmar indicando que la posición definitiva estaría a expensas de lo que las comisiones de trabajo acordaran”. Eso sí, con tal razonamiento se obviaba todos y cada uno de los planteamientos esgrimidos por la dirección de CCOO, sobre la continuidad de una misma política económica y el recorte de derechos laborales. Un artículo que concluía de la siguiente forma: “La ausencia de CCOO debilita la defensa de los intereses de los trabajadores y obliga a ese sindicato a una oposición que no puede ir más allá de las normales movilizaciones que se generan en la negociación colectiva y la reconversión industrial”. Advirtiendo, por último, de que en caso de que se llevara a cabo una intensa movilización en contra del AES, las mismas podrían conducir a una situación que “le lleve a tener más puntos de coincidencia con expresiones sindicales aún hoy marginales y apartarla del esfuerzo por conseguir avanzar en la difícil pero necesaria unidad de acción con UGT”.

El segundo día de campaña también se presentaría en varios frentes. Empezando, justamente, por la reacción del Secretario Confederal de CCOO, quien desmentía una por una todas las noticias de *El País*. El mismo medio de comunicación ante la grave tensión creada, publicaría íntegramente la resolución del órgano de dirección de CCOO e inclusive lo llevaría a su portada del viernes 19 de octubre. Eso sí, no dudaría en darle el título correspondiente en línea con la campaña desatada: “El secretario de CCOO cierra filas en torno a Camacho”³³⁴. Un texto que empezaba dejando sentado que en la reunión del CS celebrada el día 2 de octubre tan sólo se habían contabilizado dos votos en contra del *informe* presentado por Camacho. Téngase presente que a diferencia de lo que ocurría en los órganos de dirección del PSOE, UGT o la CEOE en Comisiones Obreras los periodistas podían asistir a las reuniones de su SC – “[c]omo pudieron comprobar los profesionales de la información, que tuvieron libre acceso a la reunión”, se destacaba en la misma resolución–. Recordando la puesta en marcha de una *ronda informativa* a las asambleas de trabajadores y en donde se constataba el amplio rechazo al AES, se afirmaba: “Estos datos desmienten por sí solos los infundios publicados por el diario EL PAÍS y otros medios de comunicación”.

En segundo término, la mencionada *resolución* recordaba cómo tanto sus tesis congresuales como su *Plan de Solidaridad* venía a chocar frontalmente con la política económica del Gobierno, a partir de donde se dejaba caer las siguientes reflexiones:

«Quienes son incapaces de cumplir sus compromisos electorales; quienes no pueden explicar con objetividad el contenido de un acuerdo que consagra la destrucción del empleo [...] recurren a la descalificación personal y la difusión de calumnias de quienes se oponen a un acuerdo de las características del AES [...]».

Por todo ello, era previsible, que iniciada esta campaña por el propio presidente del Gobierno, de descrédito de CCOO centrada además en el ataque personal a Marcelino Camacho, continuase precisamente en la medida en que el AES concita las críticas incluso de sectores del área de influencia del Gobierno y del PSOE».

A partir de donde se *tiraba* de memoria viva, y se recordaba como la campaña contra Camacho la había iniciado el propio Presidente. No obstante, lo más duro de aquella *resolución* venía en el punto tres: “Es de todo punto deplorable que, medios como EL PAÍS se presten a servir de altavoz de intoxicaciones más propias del amarillismo periodístico”. Un texto que, por

³³⁴ Portada, “El secretario de CCOO cierra filas en torno a Camacho”, *El País*, 19 de octubre de 1984.

lo demás, terminaba recordando el carácter plural de Comisiones Obreras e indicando el crecimiento continuado de su afiliación³³⁵.

El mismo día y a la misma hora, también desde el Secretariado Confederal de CCOO, se enviaba un urgente mensaje a todas las “organizaciones de la Confederación”. Un mensaje del que mucho se iba a hablar en los siguientes días:

«Ante el recrudecimiento de la campaña iniciada por Felipe González contra CCOO y la personificación de este ataque a Marcelino Camacho, recomendamos que las distintas organizaciones de la Confederación a todos los niveles, aprueben resoluciones y las envíen con rapidez a los medios de comunicación (y copia a la Confederación), para demostrar la unidad y la cohesión interna de CCOO. Las resoluciones deberían básicamente recoger los siguientes puntos.

- 1) Apoyo al Secretario General de la Confederación, Marcelino Camacho [...].
- 2) Reafirmación de la política de solidaridad aprobada en el III Congreso Confederal [...].
- 3) Rechazo del AES por sus contenidos negativos, dando datos de las Asambleas y reuniones celebradas por cada organización»³³⁶.

Por tanto, el cierre de filas sería total reforzándose en los siguientes días. Incluso Julián Ariza declararía como “era lógico que se desatara en algún medio esta campaña contra Marcelino Camacho, desde el momento en que Felipe González se ha dedicado insultar públicamente a CCOO y personalmente a Marcelino Camacho”. A la par que dejaba zanjado las diferencias políticas habidas durante el III Congreso Confederal: “[Camacho] no está quemado, es insustituible en el secretariado general de CCOO y su figura forma parte del patrimonio del sindicato”.

El propio Camacho primero en una reunión con corresponsales extranjeros y luego en una entrevista con Radio Nacional llevaría a cabo otras muy contundentes declaraciones: “este tipo de ataques pueden desembocar en el asesinato –porque de alguna forma se arma esos individuos que nos hacen llamadas amenazantes– o en el suicidio, cosa que no haré”. Y, con respecto a la información de un posible congreso extraordinario dejaría un recado a Rodolfo Serrano, “[la idea del congreso extraordinario era] o del que había hecho la información o de quien se la había inspirado”³³⁷.

También en la edición del viernes 19 de octubre *El País* publicaría un artículo de López Bulla en forma de carta a Marcelino Camacho. Parecía, pues, desmotarse definitivamente la *tesis del problema catalán* de Comisiones Obreras en el AES en menos de un día³³⁸. “Pues bien, los datos nos dicen que Camacho ha tenido (y tiene) razón. Y tiene razón precisamente porque su análisis se basa en los hechos”, se indicaba en el segundo párrafo de la carta firmada de López Bulla, quien se retrocedía en tiempo, exactamente, a cómo había transcurrido la

³³⁵ AHT, CCOO-SC, “Resolución del Secretariado Confederal”, Madrid, 18 de octubre de 1984, sig. 005-022. Noticia, “El secretario confederal desmiente la existencia de disensiones internas”, *El País*, 19 de octubre de 1984.

³³⁶ AHT, CCOO-SC, “A todas las organizaciones de la Confederación”, sig. 005-023.

³³⁷ Noticia, Rodolfo Serrano, “El responsable del gabinete jurídico de Comisiones Obreras ingresa en UGT”, *El País*, 19 de octubre de 1984; Noticia, “CCOO cierra filas oficialmente en torno a Marcelino Camacho”, *ABC*, 19 de octubre de 1984.

³³⁸ El mismo Rodolfo Serrano recogería también las declaraciones de Alfredo Clemente –secretario de la Unión Local de CONC de Barcelona y etiquetado como parte de la «línea dura»– al respecto de cómo había llevado Comisiones Obreras las negociaciones. Tras mostrarse satisfecho por cómo habían transcurrido las cosas, tan sólo se transcribían literalmente las siguientes líneas: «Lo que puede ocurrir es que algún sector, que no creo situado en Cataluña, esté inquieto por la forma en que se han desarrollado las cosas y pretenda colocar al sindicato en una posición más defensiva respecto al AES, precisamente en un momento en el que las posturas están más unidas que nunca en lo que respecta al rechazo del contenido del acuerdo». Noticia, Rodolfo Serrano, “El responsable del gabinete jurídico de Comisiones Obreras ingresa en UGT”, *El País*, 19 de octubre de 1984.

negociación del Estatuto de los Trabajadores. No se le escapaba, por lo demás, al Secretario General de la CONC las raíces del ataque a Camacho en donde la UGT salía mal parada:

«Nos encontramos, por lo que parece, en un momento curioso y un tanto amoral: el que tiene problemas en su casa, le exporta la crisis al otro. Y, así, vemos que los que tienen problemas de autoconvencerse sobre el descomunal incumplimiento gubernamental echan pelotas fuera, dicen que con ellos no va la cosa, y critican a Marcelino Camacho».

Parar, debilitar y dividir a Comisiones Obreras formaba, según el mismo López Bulla, de una estrategia que cada vez aparecía más clara: “Estamos –por lo que parece– ante un momento de querer romper el espinazo a una organización gloriosa, Comisiones Obreras, pero lo intentos son vanos, como lo demuestra la voluntad explícita de los trabajadores en las fábricas, que son la columna vertebral del sindicalismo”³³⁹.

En medio de tantas reacciones y de cierres de filas *El País* continuaría con su campaña con la segunda parte de la representación: *la traición*. Miguel González Zamora, cuadro relevante dentro del influyente Gabinete Técnico de CCOO y miembro de la Comisión Negociadora del AES, anunciaba su marcha al Gabinete Técnico Confederal de UGT. 2º titular del día dentro de la construcción del “problema de CCOO”. Según Rodolfo Serrano, “González Zamora tomo esta decisión en el momento en que los responsables de CCOO decidieron no acudir a las conversaciones”. Aunque el mismo periodista se le olvidaba añadir el adjetivo de “secretas” y/o “restringidas”, volvía a insistir que aquella actitud de Comisiones Obreras “no dejaba de ser una mera excusa”. No concluía ahí la representación de la “bondad intrínseca” del ahora *compañero de viaje*: “El citado asesor trató de convencer a la dirección del sindicato del error que suponía abandonar las conversaciones [«secretas» y/o «restringidas»] y, posteriormente, explicó al propio Marcelino Camacho su deseo de abandonar sus tareas. En cualquier caso, el ex-asesor de CCOO adquiriría el compromiso por parte de UGT de que no se hiciera pública su marcha hasta la conclusión del AES para enviar mayores tensiones”.

Por lo demás, en una carta que haría pública la agencia AFE de González Zamora se filtraría los siguientes epígrafes. Al respecto de las razones de su marcha se hablaba de las diferencias “con la actual global que la dirección de CCOO ha llevado últimamente”. Para al mismo tiempo incidir que comprendía las últimas razones de la posición de Camacho: “[L]as comprendo, y comprendo muy especialmente tu actuación que, en muchos casos, difícilmente podía ser otra”³⁴⁰. A pesar de que tanto UGT como CCOO en aquella ocasión preferirían no entrar en más consideraciones, en el fondo aquel movimiento venía a reproducir una batalla por el trasvase de afiliados entre ambas centrales sindicales³⁴¹. Así pues, aquel movimiento significaría una importante victoria cualitativa antes que cuantitativa para la UGT.

Sábado 20 de octubre, tercer día de campaña, tercera portada en *El País*: “Movilización del aparato de Comisiones Obreras en defensa de Camacho”³⁴². La tormenta no amainaba. Al contrario se incrementaba y atravesaba las noticias nacionales, las económicas, las editoriales e inclusive se podía localizar en el apartado de las cartas al director. Tres días de continuados ataques, comenzaban a dar sus frutos. A diez días para la gran movilización contra el AES – el 1 de noviembre en la glorieta de Embajadores en Madrid– la organización entera de

³³⁹ LÓPEZ BULLA, José Luis, “Carta abierta de José Luis López Bulla a Marcelino Camacho”, *El País*, 19 de octubre de 1984.

³⁴⁰ Al día siguiente de conocerse aquella noticia los técnicos del Gabinete Jurídico de CCOO enviarían una carta a Marcelino en donde se mostraban totalmente de acuerdo con la postura del sindicato y de Camacho, denunciando la «manipulación que se está haciendo con este tema». Noticia, Rodolfo Serrano, “Marcelino Camacho acusa a Felipe González de ser el instigador de una campaña contra su persona”, *El País*, 20 de octubre de 1984.

³⁴¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El responsable del gabinete jurídico de Comisiones Obreras ingresa en UGT”, *El País*, 19 de octubre de 1984

³⁴² Portada, “Movilización del aparato de Comisiones Obreras en defensa de Camacho”, *El País*, 20 de octubre de 1984.

Comisiones Obreras –incluido el PCE/PSUC³⁴³– se había volcado en apoyar a Camacho y en negar cualquier tipo de división interna. El *cierre de filas* –segundo gran objetivo de cara a plantear la imagen de Comisiones Obreras como una organización dogmática cuando no radical y en donde los sectores carrillistas se les representaban como los más intransigentes y más apegados al Secretario General– no dejaba de incrementarse, día a día. Camacho en una asamblea de delegados en Cádiz no ahorraría en críticas tras las declaraciones del jueves anterior. “La llamada caza del rojo resulta peligrosa porque puede acabar dando paso al fascismo”, declararía en plena asamblea, tras haber resaltado que había salido reforzado personalmente de la crisis y ni había ni existirían fisuras internas en la organización. Lo que venía a traducirse en que no se movería de su puesto hasta la celebración del IV Congreso Confederal prevista para dentro de unos años.

Las muestras de apoyo a Camacho y a la organización no dejaban de incrementarse. En una campaña con el apoyo explícito de la dirección de Comisiones Obreras –tal y como acabamos de observar documentalmente– se invitaría a un masivo envío de cartas y telegramas a la redacción de *El País*. Tan sólo el viernes se recibirían más de 60 telegramas por parte de la mayoría de las federaciones y regiones de CCOO, hasta abrir *El País* una sección titulada: “Telegramas de apoyo a Camacho”. La mayoría con el mismo texto venían a denunciar la campaña del citado periódico. Por ejemplo, en la firmada por Rodolfo Benito se podía leer el siguiente texto:

«El Sindicato Provincial de Trabajadores de la Salud de CCOO de Málaga, ante [el] ataque de su periódico al compañero Marcelino Camacho, manifiesta su apoyo total al secretario general y a la línea seguida por nuestra confederación. Este sindicato deplora [la] burda campaña de desprestigio contra CCOO por su firme postura de rechazo al AES y lamenta que su periódico haya aceptado este trabajo sucio».

En otros telegramas se calificaría al AES como “antiobrero, antisocial y antieconómico” o directamente se hablaría de la “descarada política de EL PAÍS pro política antiobrero del Gobierno”. Para *El País* o mejor dicho para Rodolfo Serrano y sus “fuentes solventes” aquello era la más clara constatación de una maniobra dirigida por los sectores carrillistas de CCOO –“precisamente la que mantiene posturas más radicalizadas en el seno de la organización [...] [y] la menos interesada en que se abra un auténtico debate en el sindicato”– destinada a que “el conflicto quede reducido a un ataque personal, para abortar los inicios de una discusión intensa sobre la estrategia a seguir”. Así pues, el *enemigo* había sido identificado –la Federación Metal de CCOO, “de tendencia carrillista”–. Lo que tenía la virtud de mezclar intencionadamente las siglas del PCE con las de CCOO, verdadera obsesión del periódico como por parte del *entorno socialista*. Por citar, tan sólo un ejemplo al respecto: en el número 368 de *El Socialista* –correspondiente a los días del 15 al 31 de octubre– se publicaría una nota editorial en la misma portada –junto con el titular “AES: Pacto de solidaridad para luchar contra el paro”– titulada: “En el trastero de la historia”, y en cuyo primer párrafo, entre otros que se podía citar, se podía leer:

«Marcelino Camacho y Santiago Carrillo se han dedicado estos últimos tiempos al insulto y descalificación de todo aquel que no comparte sus tesis o sus puntos de vista. Tras el paréntesis eurocomunista, recuperan el sectarismo y la intransigencia que tan tristemente

³⁴³ El miembro del Comité Ejecutivo del PSUC, Rafael Ribó, declararía el viernes 19 lo siguiente al respecto de la campaña de *El País*: «Por el contrario cuando Felipe González afirmó que quién está contra el AES está contra España, incurrió en un tono de contenido franquista impropio de una situación democrática». Por su parte Nicolás Sartorius –responsable económico del PCE– señalaría: «Creo que existe una campaña contra CCOO, y que esa campaña viene no de la prensa, sino del Gobierno [...]. Por ello me resulta muy sospechoso que vayan contra el liderazgo de Marcelino, que es un tema que hace unanimidad en Comisiones». Noticia, “PCE y PSUC coinciden en que se trata de un ataque al sindicato”, *El País*, 20 de octubre de 1984.

esgrimieron en otros tiempos. Vuelven a las viejas formas, al estilo que les fuera tan peculiar antaño»³⁴⁴.

Pero volviendo, de nuevo, a las siempre “fuentes cualificadas de CCOO” de las que hablaba Rodolfo Serrano, sin dar ningún otro tipo de detalle a partir de dónde se las pudiera identificar, habían adquirido el derecho de poder expresar su singular línea de opinión en el mismo periódico: “Fuentes cualificadas de COO reafirmaron ayer la necesidad objetiva que el sindicato tiene de profundizar sobre la estrategia a seguir y el deseo de ir reduciendo paulatinamente la influencia directa de Camacho”. Añadiendo, “aunque reconocieron la imposibilidad de plantearlo en estas condiciones porque las noticias aparecidas en los medios de comunicación han tenido un efecto *boomerang* y han sido utilizadas para reducir el problema a una cuestión personal”. Incluso aquel día iría más allá el propio Serrano, pues también entraría a *opinar* antes que a *informar* sobre el contenido de los telegramas: “Y en ningún caso se plantea lo central de la noticia: el deseo de sectores cualificados y numerosos de CCOO de abrir un debate, ideológico que dote a la organización de una política sindical que no se base exclusivamente en la inspiración carismática de su actual secretario general”³⁴⁵.

«Los telegramas que hoy publica EL PAÍS, en su identidad prosódica, ortográfica y sintáctica, demuestra la capacidad de consigna y disciplina que ese aparato todavía mantiene. Pero dudamos de que eso estimule a afiliarse a CCOO. Porque sólo nos hablan de la vieja tentación de matar al *mensajero*, pero no de los problemas reales que Comisiones Obreras y sus representados, tienen».

Con este tono *amable y condescendiente* terminaba uno de los editoriales más duros que haya publicado *El País* en relación a Comisiones Obreras y a Marcelino Camacho. Publicado también el sábado 20 de octubre, la reacción editorial de *El País* será en extremo dura y agresiva –y puestos al caso, *elitista*– tanto o más que las propias declaraciones de Felipe González que tanto criticara el mismo medio de comunicación días antes. Sin llegar a calificar de *estalinista* la organización –aspecto éste que desde determinados sectores de UGT no se tenían tanto remilgos– se hablaría de cómo la reacción de CCOO “sería cómica si no fuera también triste: parece el fruto de viejos reflejos históricos que confunden lo personal con lo político y se traduce en un cierre de filas que niega la reflexión crítica para doblegarse ante las exigencias del poder”. Extrañamente interesados desde *El País* en rescatar las tesis del III Congreso Confederal –cuyos resultados finales, en la práctica, se alababan desde aquellas mismas líneas editoriales unos meses atrás– así como la figura de Camacho –“viejo luchador y líder obrero”– aquella nota editorial venía a incidir en los problemas ideológicos de CCOO: “El debate ideológico, herencia en gran medida de la crisis sufrida por el partido comunista, se centra en cómo hacer comprender a sus afiliados y al conjunto de los trabajadores la necesidad de una táctica de contestación contra un Gobierno que es de izquierdas y, paralelamente, justificar la adopción de un nuevo modelo sindical”. Situación que llevaba a concluir como “[e]n este contexto, CCOO necesita una redefinición ideológica”. Ello tras advertir de la supuesta falta de debate tras el III Congreso Confederal y la práctica de automarginación de CCOO. En cualquier caso, el gran responsable de toda la situación tenía un nombre: “El rechazo frontal de Comisiones al Acuerdo Económico y Social (AES), responsabilidad que corresponde en gran medida a Camacho, contradice buena parte las citadas resoluciones”³⁴⁶.

La *nota de opinión* dio mucho que hablar dentro como fuera de CCOO. Incluso llamaría poderosamente la atención al intelectual marxista Manuel Sacristán, quien lo interpretó

³⁴⁴ “El trastero de la historia”, *El Socialista*, n° 368, (1984), p. 1. Entre otros textos, también se incluía el siguiente artículo de opinión: PARAMIO, Ludolfo, “Comisiones cabalga de nuevo” (p. 3). También uno números más adelante consúltese: BERNADÉ JIMÉNEZ, Jesús, “Diálogo y negociación”, *El Socialista*, n° 371, (1984), p. 6.

³⁴⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “Marcelino Camacho acusa a Felipe González de ser el instigador de una campaña contra su persona”, *El País*, 20 de octubre de 1984.

³⁴⁶ Editorial, “El extraño viaje de Comisiones Obreras”, *El País*, 20 de octubre de 1984.

como una *vileza* y un *desprecio* hacia la capacidad de elaboración intelectual del conjunto de la clase obrera:

«¿De verdad es tan horrible que muchas organizaciones de CCOO enviaran un telegrama de protesta prácticamente idéntico? *El País* pensó que sí [...]. La elegancia del comentario era inteligente: enfrentando a la burda uniformidad de esos ignorantes burócratas obreros, el periódico no responde destempladamente, ni siquiera cuenta algún pertinente chiste de Guareschi; sólo se refiere con un guiño graciosamente académico a la ‘identidad prosodia, ortográfica y sintáctica’; la discreción potencia el desprecio hasta un sarcasmo que sólo el gran esfuerzo autodidacta de los más destacados líderes de CCOO conseguirá barruntar»³⁴⁷.

De vuelta al editorial, el mismo también sería duramente contestado desde el SC, aunque en dicha ocasión sería ignorado por *El País*. Reunido el martes 23, y ya dentro de la envenenada como perversa dinámica establecida de *acción-reacción*, junto con la respuesta que a continuación de detallará, se relevarían las “dificultades que UGT está teniendo en la explicación del Acuerdo, según algunos compañeros”, lo que estaba conduciendo a la “participación de afiliados de este sentido en nuestras asambleas pronunciándose en contra del Acuerdo”.

Yendo a la citada *resolución*, desde Comisiones Obreras se ahorrarían las buenas palabras para pasar a la ofensiva:

«No suele ‘El País’ incurrir en falseamientos informativos de este tipo y magnitud. ¿Por qué rompe de modo tan ostensible su objetividad, dedicándole nada menos que la primera página y un editorial, precisamente en este momento y precisamente con CCOO?».

No cabían las dudas: “Dicho más claramente, ha optado [*El País*] para con CCOO, la misma actitud que el Gobierno y, objetivamente, el despliegue informativo del diario continua la línea de ataques emprendida por el presidente del Gobierno”. Para concluir con un rotundo mensaje: “«El País» es libre de elegir su línea ideológica, pero creemos que serviría mejor a la democracia como diario independiente que como portavoz de un gobierno”³⁴⁸.

También aquel mismo día en *El País* se pudieron leer, por vez primera, parte de las razones de fondo y de alcance por las que Comisiones Obreras en su conjunto se habían opuesto al AES. La publicación de un artículo de Jorge Aragón y Enrique Lillo –dos de las cabezas visibles del Gabinete Técnico de CCOO– vinieron a aclarar –eso sí a quien quisiera leerlo detenidamente– los “poderosos” argumentos que llevarían a Comisiones Obreras a adoptar su crítica posición, y que iban mucho más allá de la figura de un dirigente obrero. De entrada, cuestionaban la naturaleza jurídica del pacto en un debate que cada vez iba adquiriendo mayores posiciones enfrentadas: “En primer lugar, y respecto de su naturaleza jurídica, no es un convenio colectivo”, afirmaban. “La falta de representatividad suficiente y mayoritaria de UGT, [...] impide su consideración como convenio colectivo. Es un mero contrato civil, en el que sólo los firmantes han contraído obligaciones”. En el terreno de las cifras destacarían Aragón y Lillo como al leer los datos de la inversión pública en los Presupuestos Generales la misma se había reducido en 7.100 millones, matizando como “las transferencias corrientes [...] disminuyen en 250.000 millones de pesetas, y las remuneraciones de personal, en 40.900 millones de pesetas”. La primera conclusión sobre el AES se resumía de la siguiente forma: “Es decir, el compromiso real ni significa un aumento de la inversión pública total, más bien al contrario, ni es de 50.000 millones de pesetas”.

Por otro lado, y al respecto de la demanda de UGT sobre dotar de un fondo con dinero público para la realización de 100.000 contratos mediante diversos convenios con el INEM y corporaciones locales, se observaba como los mismos como máximo tendrían tres meses de duración: “La duración no es irrelevante, y con este tipo de contratos, los trabajadores no tienen derecho al seguro de desempleo”. De igual opinión eran al respecto del destacado Fondo de

³⁴⁷ SACRISTÁN, Manuel, “Nota..., *op.cit.*, pp. 16-17.

³⁴⁸ CCOO-SC, “Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 23-X-1984”, sig. 005-014, dentro de la misma serie se puede localizar el citado *comunicado*.

Solidaridad, en apoyo a las nuevas contrataciones³⁴⁹. Lo que se traduciría en lo siguiente: “Es decir, nuevas bonificaciones o indemnizaciones económicas a algunas empresas privilegiadas, que pagarán, de hecho, menos del salario legal o convencionalmente establecido”. Pero la situación se volvía más grave ya que tras revisar las nuevas cotizaciones y aportaciones al Fondo de Solidaridad –Capítulo II, artículo 8 del AES– resultaba que “las empresas aunque algunas de ellas se benefician, no aportan en realidad nada al Fondo de Solidaridad”³⁵⁰.

No concluían todos los *males del AES* ahí. Se advertiría, así, de la gran preocupación del Gobierno por desarrollar cuantos antes la reforma de la Seguridad Social, que en base a “las líneas no explicitadas en el acuerdo”, conllevarían, de forma probable, una reducción de los derechos socioeconómicos adquiridos. Igualmente se hacía eco de la petición de la CEOE en la aplicación de la Directiva del 17 de febrero de 1975 de la CEE, en donde se afirmaba como sería “ingenuo y erróneo pensar que este capítulo no significa nada. Si así hubiese sido, no se habría incluido en el acuerdo”. Para concluir aquel largo artículo de tintes técnicos antes que políticos se reclamaba, tras recordar toda la normativa y jurisprudencia correspondiente, la necesidad de que Comisiones Obreras participará en todas y cada una de las Comisiones de Seguimiento previstas en el AES³⁵¹.

No obstante, la campaña no finalizaría en aquellos días. De hecho, se extendería hasta el final de aquel convulso mes de octubre. Sin embargo, se relajarían los contenidos de las declaraciones e inclusive las formas. Durante una asamblea en Valladolid el propio Camacho

³⁴⁹ Complementétese lo anterior con el análisis de, PARRA, Tomás, “El fondo de solidaridad en la negociación del AES”, *Gaceta Sindical*, n° 32, (1984), pp. 15-17.

³⁵⁰ «Se afirma que la financiación de los 60.000 millones será por terceras partes, trabajadores, empresas y Estado. El mecanismo es el siguiente: se creará una cotización excepción del 0,28% a cargo del trabajador y otro 0,28% a cargo de la empresa en la base de cotización de formación profesional. Ahora bien, el tipo de cotización de formación profesional de los empresarios en 1984 ha sido del 0,4%. Para 1985, y según el capítulo V del AES, será del 0,12%, es decir, disminuye, precisamente, el 0,28%, que es su aportación al Fondo de Solidaridad». ARAGÓN, Jorge y LILLO, Enrique, “Reflexiones en torno al AES”, *El País*, 20 de octubre de 1984.

³⁵¹ ARAGÓN, Jorge y LILLO, Enrique, “Reflexiones en torno al AES”, *El País*, 20 de octubre de 1984. En las páginas de *Gaceta Sindical*, los citados autores ampliarían el citado texto con no pocos datos y matices a tener presentes: ARAGÓN, Jorge y LILLO, Enrique, “El AES, un acuerdo para la CEOE”, *Gaceta Sindical*, n° 32, (1984), pp. 10-14. Por aquellas mismas fechas, Nicolás Sartorius, cabeza visible en temas económicos del Partido Comunista –aunque en aquella ocasión firmaba el texto como Vicesecretario General del PCE– planteaba un argumento en líneas semejantes con el anterior. Tras una larga introducción venía a señalar como en el concurso de los diferentes paradigmas económicos, el conservador-liberal constituía la «opción adoptada por el actual Gobierno español, una de cuyas plasmaciones concretas ha sido el famoso AES y los Presupuestos Generales del Estado». Para afirmar a continuación algo de sentido común: “[n]o es está obviamente la única política posible”. Y pasar a ofrecer una serie de datos: «la inversión pública desciende en 1985, mientras, por el contrario, *se espera* que la privada crezca en un 5,5%, teniendo en cuenta la acumulación de beneficios que se ha originado en 1984 (alrededor del 18,4)». En esta dramática situación, la política de disminución de la presión fiscal, según Sartorius, vendría a empeorar notablemente la situación. De hecho en «el AES no se diseña ningún tipo de reforma fiscal mínimamente progresiva [...] por el contrario, modifica aspectos del impuesto sobre sociedades que en conjunto suponen un aumento de los beneficios fiscales para las empresas». Hasta tal punto, las posiciones de la CEOE se veían favorecidas que como indicaba Sartorius el «se encarga a la CEOE el estudio sobre la reforma de la empresa pública, no parece que la patronal tenga motivos para estar disgustada con el Gobierno socialista». Señalando, por último, de los riesgos que conllevaría que la propuesta patronal en relación a la autorización administrativa de cara al despido colectivo saliera adelante. E indicando como se vería modificado el Real Decreto 696/1980, de 14 de abril, *aplicación a expedientes de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y de suspensión y extinción de las relaciones de trabajo*. SARTORIUS, Nicolás, “¿Por qué no al AES?”, *El País*, 25 de octubre de 1984.

declararía como “Comisiones Obreras solamente considera como enemigos al gran capital y las multinacionales”³⁵².

Otra muestra lo constituiría el artículo que Sergio Santillán y Enrique Calvet firmarían como miembros del Gabinete Técnico Confederal de UGT para *El País* en la última semana de octubre, en contestación al suscrito por Aragón y Lillo en nombre de Comisiones Obreras. Se trataría de una contestación que por una vez no caería en el mero y sistemático ataque contra CCOO. Ahora bien, ha de advertirse que UGT, en gran medida, se quedaría cada vez más aislada en la defensa única del AES, junto con alguna voz empresarial aislada³⁵³. “En todo caso, parece claro que el AES [...] pertenece a la categoría de los llamados pactos o contratos sociales”. Citas interesadas de autoridad aparte, venían a indicar como al final “su eficacia dependerá de la voluntad política que tengas las partes en cumplirlo y desarrollarlo”. O dicho en otras palabras no se refutaban los argumentos de Aragón y Lillo. Por lo demás, en cuanto al tema del gasto público la guerra de cifras volvía a primera línea, aunque dejando claro, en primer lugar, que lo “que hay que valorar es que por primera vez en nuestro país este tipo de cuestiones entra a formar parte de un acuerdo nacional tripartito”. Y en cuanto a los datos, las sumas y las restas de UGT, que quitaban un tanto por una partida –capítulo IV– para ponerla en otras –capítulos VI y VII– de los Presupuestos Generales, daban un resultado muy distinto al ofrecido desde Comisiones Obreras: “Esto es un 15% más de lo presupuesto para 1984 y supone un aumento de la inversión pública en términos reales del 8%”.

En lo que respecta al tema de los contratos temporales venían a replicar como “los negociadores del acuerdo” habían tenido presente la RET’84 y la reforma de la Ley de Protección por Desempleo, de tal forma que si hasta entonces habían sido de tres meses la duración, a partir de entonces –aunque sin contrastar tal afirmación con datos– “los contratos, en el peor de los casos, o serán temporales, por lo que durarán como mínimo seis meses y darán derechos a las prestaciones básicas y complementarias, o serán eventuales para tres meses, lo que otorga tres meses de prestación complementaria si se tienen cargas familiares”. En un ejemplo de cierta humildad se concluía en cómo era mejor tener un empleo temporal y precario que estar en paro, aunque conllevará una creciente dualización del mercado de trabajo: “No es ninguna panacea, pero es más, mucho más de lo que había y para luchar contra el paro ningún logro es pequeño”. Si hasta aquí, las contestaciones mantenían un cierto nivel y se trataban de comparar datos y argumentos, con respecto al Fondo de Solidaridad, la respuesta dada parecía bastante pobre: “Respecto al Fondo de Solidaridad, nos parece trivializar y empobrecer la discusión si se la reduce a cuánto pagan los empresarios [...]”. A través de este curioso concepto de *solidaridad* por parte de UGT reducido en la práctica a trabajadores y el Estado, además se daban por válidas las axiomas liberales con respecto a la necesidad de reducir las cotizaciones. El fundamento: lo decían supuestamente “todos los especialistas”. Evidentemente no era así. Aquella larga contestación, por último, dejaba bien claro como el “AES no abre la puerta a ningún despido colectivo más barato y decidido unilateralmente por el empresario [...]”. UGT se expresará con toda claridad defendiendo el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción actual”³⁵⁴.

³⁵² Noticia, “Camacho dice que el Gobierno no es el gran enemigo de Comisiones”, *El País*, 25 de octubre de 1985.

³⁵³ Un ejemplo inusual a reseñar, sería, justamente, un conjunto de artículos que publicaría el empresario José María de Escondrillas durante el mes de noviembre en el mismo *El País*. El citado autor, llegaría solicitar que el AES, por lo menos, se extendiera en el tiempo seis años, «para empezar a crear de verdad empleo, regenerar el tejido empresarial español y poder abordar así una entrada en la CEE con alguna probabilidad de éxito». ESCONDRILLAS, José M^a de, ¿Un pacto de Estado contra el paro?/1”, *El País*, 2 de noviembre de 1984.

³⁵⁴ SANTILLÁN, Sergio y CALVET, Enrique, “En síntesis, un buen acuerdo”, *El País*, 26 de octubre de 1984. Una versión ampliada del mismo se puede localizar en: SANTILLÁN, Sergio y CALVET, Enrique, “Realidades por encima de demagogias”, *Unión*, n° 59, (1984), pp. 6-7.

Aquel mes terminaría con un conjunto de declaraciones y entrevistas de Marcelino Camacho. Todo ello con nota a destacar: no se producirían más reacciones, manteniéndose un prudente silencio por parte del resto de los agentes implicados en la firma y en el desarrollo del AES. Así pues, el 25 de octubre declaraba en Radio EL PAÍS como existía “una gran coincidencia entre los ataques iniciados por Felipe González y la información publicada por el periódico EL PAÍS”, a la par que negaba que hubiera movimientos internos para desalojarle de la Secretaría General³⁵⁵. En otro *signo* de normalización el domingo 28 de octubre el mismo periódico publicaba una larga entrevista suya. Realizada por Rodolfo Serrano y Félix Monteiro, dos de los pesos pesados en laboral y nacional, y más allá de alguna anécdota con la que adornar la misma, Camacho contestaba claramente a las preguntas de los citados periodistas. Así, por ejemplo, al respecto de la *democracia interna* dentro del sindicato contestaba: “CCOO es una organización pluralista y democrática, donde se discute mucho. Que nadie se extrañe de que existan corrientes en su interior, porque están reconocidas en los Estatutos”. Tras calificar de “Gobiernos aparentemente demócratas” que firman determinados acuerdos, destacaría como “tenemos el mayor grado de unidad de los últimos años”, saliendo al paso de las noticias publicadas por *El País*. Más interesante todavía resultaría su respuesta a la pregunta de los porqués del rechazo de CCOO al AES:

«Es que el AES no crea empleo [...]. El Gobierno tenía necesidad de que firmara el AES, porque necesita un aval político y para conseguirlo no ha ahorrado concesiones. Se arrastra ante la patronal y luego la CEOE le pega la bofetada más gorda que se puede dar. La patronal [...] ni siquiera se lo agradece porque, parafraseando el viejo dicho, Roma no paga traidores.

[...]

Es el colmo: el Gobierno ha matado sus promesas y ahora quiere encima que asistamos al entierro que nos hagamos cómplices de su fracaso. El AES ha sido el certificado de defunción del programa socialista».

Continuaría en aquella entrevista advirtiéndole de los objetivos políticos que se habían buscado en el AES a la par que no ahorraba críticas contra el Gobierno: “En lo político, ceden a la derecha; en lo social, ceden a la patronal. No niego que el Gobierno ha hecho cosas positivas pero, en lo fundamental, hacen una política más reaccionaria que la de Suárez y no es que Suárez fuera menos reaccionario, pero tenía menos arrogancia”³⁵⁶.

En paralelo a lo anterior Comisiones Obreras tendría que hacer frente a un segundo frente: el jurídico de cara evitar su exclusión y marginación de las comisiones de desarrollo del AES, por más de lo que la Ley, la jurisprudencia y las buenas costumbres dijeran que tenían que estar por las razones ya tantas veces expuestas. Un segundo frente de desgaste en el que se invertirán no pocos esfuerzos en tratar de evitar, visto lo visto durante la pre-negociación, la negociación y la post-negociación del AES, lo inevitable. Pero al mismo tiempo en esta batalla jurídica a la par que política que se prolongará hasta el final del año 1984, conllevará, a fin de cuentas, un bajo perfil opositor a nivel de la calle, lo que repercutirá en las movilizaciones que se llevarían a cabo en este tiempo, empezando por la “Jornada de Movilización Nacional” del uno de noviembre.

La multiplicación de los frentes abiertos –en donde habría que sumar también los ingentes esfuerzos organizativos en la reconversión naval y en otros sectores en proceso de

³⁵⁵ Noticia, “«No hay movimiento oficial dentro de Comisiones Obreras para apartarme de la dirección del sindicato»”, *El País*, 26 de octubre de 1984. En una conferencia celebrada el 29 de octubre el propio Camacho insistiría en esa misma tesis: «[A]lguien, en un lugar muy elevado del Gobierno, había abierto, la veda de la caza del militante obrero, con sus insultos previos”. Para concluir como el principal motivo de la campaña abierta giraba en torno a que CCOO es «en estos momentos [...] el obstáculo fundamental para su política, antieconómica, antisocial y antisindical». Noticia, “Marcelino Camacho insiste en que el Gobierno ha organizado una campaña contra CCOO”, *El País*, 30 de octubre de 1984.

³⁵⁶ Entrevista, “Marcelino Camacho”, *El País*, 28 de octubre de 1984.

reindustrialización– imposibilitarían así a Comisiones Obreras plantar mayor cara al AES en el terreno en donde había obtenido sus mejores resultados. Con una organización tensada al máximo, con síntomas de agotamiento tras un frenético año de movilizaciones y congresos, la capacidad de movilización, pues, se vería seriamente afectada.

A esto se sumaría que, una vez más, tendría que presentar batalla contra el Acuerdo Económico y Social en solitario, aunque en esta ocasión con una oposición debilitada por parte de UGT que no atravesaba, precisamente, sus mejores momentos a nivel interno. De hecho, y tal como se ha visto en la reunión del SC del 23 de octubre, se estaba produciendo un trasvase de militantes de base de UGT a CCOO. Un dato a tener presente. Como a tener presente –más allá de lo que se decía en público o ante militantes aguerridos en plena efervescencia asamblearia– es el mandato que saldría de una reunión de la CEC de UGT, a principios de noviembre, a las diferentes Uniones y Federaciones, de cara a que no realizarán “actos conjuntos con el Gobierno para explicar el AES”³⁵⁷.

Pese a todo lo anterior, la *paz laboral* antes que la *paz social* comenzaría a ganar enteros. De este modo, y en comparación con lo que había acontecido durante el primer trimestre de 1984, la respuesta frente al AES quedaría bastante reducida en cuanto a su impacto social y mediático. Todo un signo de que el ciclo álgido de protestas de 1984 había superado su meridiano y se dirigía a su declinar, con algún que otro pico, a la par que las *condiciones objetivas* y *subjetivas* para la convocatoria de una huelga general desaparecían, por más que en los cálculos estratégicos de Comisiones Obreras aquella posibilidad nunca se llegará a plantear de forma concreta como real.

Cuando prácticamente no había amainado la campaña contra Comisiones Obreras, los servicios jurídicos del sindicato se veían obligados el 26 de octubre a presentar una denuncia ante el Juzgado de Guardia correspondiente. La causa: la exclusión directa de CCOO de 9 comisiones del AES. Mediante un contencioso administrativo destinado a la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, el sindicato basaba su escrito en los artículos 28.1 y 129.2 de la CE así como en la doctrina de la OIT. Aquel mismo día Camacho también se dirigiría por carta a Almunia para solicitar su incorporación a las citadas comisiones del AES, con especial incidencia en la referida a la reforma de la Seguridad Social –la cual se había abierto el 22 de octubre– para lo que llegaría a contar con el apoyo de la Federación de Banca de UGT³⁵⁸. La respuesta del sector mayoritario de UGT no tardaría en llegar.

En medio del calor fraternal de una asamblea en Barcelona con la presencia de más de 2.000 delegados de la central socialista, Nicolás Redondo advertiría que por el camino de la judicialización del AES, Comisiones Obreras no conseguiría nada. En un tono de cierta superioridad –a modo de arbitro de una competición– pero en donde, a su vez, evitaría buscar un posible enfrentamiento con el sindicato comunista, sabiendo indicaría: “Dirigiéndose directamente a nosotros siempre encontraría una inclinación positiva”. Con un entusiasmo medido no falto de cierto populismo, asimismo, afirmaría como “este acuerdo ha sido el que ha tenido mejor acogida entre los trabajadores, porque ha sido el mejor acuerdo que hemos firmado”. Dejando también otro recado: “cuando firmamos es porque es un acuerdo revolucionario y cuando no firmamos es porque no lo es, lo cual es una forma de pensar más propia de mentes aristocráticas”. Mucho menos condescendiente se mostraría, en cambio, José Luis Corcuera quien también participaría en aquella asamblea: “Si vienen a trabajar, bienvenidos sean, pero si vienen a buscar una plataforma de propaganda gratuita las cosas cambian”³⁵⁹.

³⁵⁷ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 27. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 6 de noviembre de 1984”, sig. 002251-003.

³⁵⁸ Noticia, “CCOO denuncia al Gobierno ante el juzgado de guardia por excluirse del AES”, *El País*, 27 de octubre de 1984.

³⁵⁹ Noticia, “CCOO debería solicitar participar en el AES y no ir a los tribunales”, *El País*, 30 de octubre de 1984.

En lo que *El País* calificaría como un simple mitin para Comisiones Obreras era la culminación de una Jornada Nacional de Movilizaciones, que venía preparándose asamblea por asamblea en cada uno de los centros de trabajo. En una estrategia similar a la empleada en las *jornadas* de febrero y de marzo de 1984, la primera gran movilización contra el AES prevista el día 1 de noviembre en Madrid, no llevaría a juntar a más de 20.000 personas según CCOO y a entre 8.000-10.000 la Policía Municipal. Cifras muy por debajo de las del 1º de Mayo, sin ir más lejos. Y aunque tan sólo fijarse en los datos puede resultar bastante empobrecedor, aquello se constituiría en la primera manifestación de que una cosa es que el AES provocará rechazo entre la clase trabajadora y otra muy diferente que pudiera convertirse en un catalizador para la movilización. Realizado el mitin en la Glorieta de Embajadores, una vez que se había denegado el permiso para llevarlo a cabo en la Plaza Mayor –a pesar de que se ganara un recurso posteriormente ante la Audiencia Territorial de Madrid– es un vano intento de *invisibilizar* la convocatoria; Marcelino Camacho ante un público volcado no dudaría en calificar el AES como “una farsa orquestada al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI)” y de “maquinaria de guerra contra trabajadores”, recordatorio incluido de los ataques de González contra su persona. En la memoria viva de Ariza también estaría la campaña desatada contra Comisiones Obreras, cuando señalaría como se “inventan patrañas contra CCOO que nadie en sus cabales puede entender”, para concluir como el AES “consagra la política antisocialista y antiobrera de Felipe González”³⁶⁰.

Pese a todas las circunstancias expuestas, pese a todos los contratiempos, pese a todas las maniobras contra Comisiones Obreras, el sindicato no había parado en su estrategia de movilizaciones, por más que la respuesta no hubiera cumplido sus expectativas. De hecho, el Consejo Confederal celebrado los días 20 y 21 de noviembre programaría un nuevo calendario de movilizaciones, con el objetivo de que no se enfriará la potencialidad de respuesta contra el AES. Así por ejemplo se programarían mítines y manifestaciones para los días 22 o el 29 de noviembre Madrid, aunque la campaña se extendería por todo el país. Ahora bien, se volvía de dejar muy claro que las mismas estaban lejos de poder confluír en un paro y/o una huelga general, por más que los “delegados de personal y miembros de Comités de Empresa afiliados a CCOO han rechazado unánimemente el «Acuerdo Económico Social»”, y de todas sus consecuencias aledañas. De esta forma, en la resolución final se podía leer:

«El Consejo Confederal de CCOO al mismo tiempo que expresa su solidaridad y pleno apoyo a todas estas luchas, reitera el llamamiento a proseguir extendiendo e intensificando la movilización de los trabajadores, para que de forma general se diga no a los proyectos de salida de la crisis de la derecha, asumidos en su mayor parte por el Gobierno. Todo ello con el objetivo de propiciar la máxima confluencia de sectores en lucha en torno a una fecha del mes de febrero»³⁶¹.

Con unas Comisiones Obreras *sin domesticar* aunque reducidas sus capacidades movilizadoras, se iniciaría una nueva campaña contra el sindicato y más concretamente contra la persona de Marcelino, que tan buenos resultados había dado de cara a paralizar a la organización en su conjunto. Una campaña similar en sus rasgos y formas, y muy probablemente, pensada bajo los mismos objetivos: desviar la atención mediática de lo que se negociaba en torno al AES, reconcentrar las energías del sindicato en la defensa de su Secretario y de su unidad interna, y así paralizar una dinámica huelguística con motivo de la reconversión naval –antes que con el AES– que estaba adquiriendo una especial virulencia.

“Las frases como que el Gobierno «ha levantado la veda contra el obrero» son tremendas y reflejan un absoluto desequilibrio interno, impropio de un líder sindical”. El autor de este *amable* comentario sería Joaquín Almunia, el mismo Ministro de Trabajo que no tenía problemas en calificar de “mal menor” la economía sumergida y quien se mostraría

³⁶⁰ Noticia, “Marcelino Camacho pidió el voto de los trabajadores contra los que incumplen sus compromisos electorales”, *El País*, 2 de noviembre de 1984.

³⁶¹ AHT, CCOO-CC, “Acta de la reunión del Consejo Confederal de los días 20/21-XI-1984”, sig. 2-17.

comprensivo en las mismas declaraciones con quienes tomaban este camino. Comprensivo también se mostraría con las empresas a las que se les ofrecería una conocida solución para que se pasarán a lo legal: “mediante la reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social”. Pero volviendo a las declaraciones contra Camacho, Almunia volvería a insistir en la muy supuesta teoría de la división interna del sindicato: “[L]a mayoría de los miembros de CCOO no están de acuerdo con Camacho”. A lo que sumaba, cómo no, el otro punto de apoyo tradicional de la narrativa socialista al respecto: “[CCOO no firmo el AES] por razones políticas, [por] los intereses que esta central”, para rematar indicando como Comisiones no entendía “cómo funciona nuestra economía”³⁶².

Como un solo hombre, Comisiones Obreras volvería a involucrarse en la defensa de Camacho, a la par que no dejaba de evidenciar su propensión a caer en cualquier tipo de provocación. Desde ahí hasta el mes de diciembre no dejarían de sucederse toda una serie de acontecimientos. Por parte de Almunia, no habría rectificación sino más bien ratificación de sus declaraciones el 12 de noviembre³⁶³. Días después, y rebajos los ánimos el Gabinete Jurídico prepararía una querella contra el Ministro de Trabajo, a debatirse en la Comisión Ejecutiva del 19 de noviembre³⁶⁴. De hecho, tan seria se pondría la cosa a que a finales de aquel mes el propio Camacho se dirigía por vía notarial a Almunia para que aclarara sus declaraciones³⁶⁵.

Al final, las cosas no llegarían a mayores en tanto el Ministro de Trabajo, quien no rectificaría de sus declaraciones iniciales, buscaría la artimaña oportuna tras una previa consulta al diccionario de la Real Academia Española (RAE). Como daría a conocer el propio Camacho en el programa *Hora 25* de la SER, Almunia le enviaría una carta indicando que había querido decir con sus oportunas declaraciones: tras destacar que según la RAE *desequilibrio* también es *falta de equilibrio* y esta se define como “estado de un cuerpo cuando encontradas fuerzas que obran en él se compensan”. Indicándole también que “convendrás conmigo que alguna de tus valoraciones de las acciones de este Gobierno no siempre concuerdan con la justa y proporcionada distribución”³⁶⁶.

Ahora bien, para aquellas fechas –primera semana de diciembre– no sólo las movilizaciones contra el AES se habían desinflado, sino que se había conseguido marginar y excluir a Comisiones Obreras de las principales comisiones del Acuerdo Económico y Social, empezando por la de la Seguridad Social. El Gobierno se apuntaba así otro valioso tanto.

En el frente jurídico del AES, Comisiones Obreras seguiría batallando sin prácticamente descanso. Mientras que las comisiones correspondientes de desarrollo del acuerdo social se seguían reuniendo y avanzando en sus trabajos, desde CCOO se trataría de todas las maneras de participar sabiendo lo mucho que se jugaba. Tras la denuncia presentada en el Juzgado de Guardia correspondiente, se redoblaría su estrategia de presión mediante el envío de cartas a UGT, CEOE y CEPYME –un 5 de noviembre– en donde se les convidaba a abrir las Comisiones Obreras las citadas comisiones en base su representatividad y otros tantos argumentos expuestos y defendidos en numerosas ocasiones. Por más que Camacho llegara a

³⁶² Noticia, Isabel Llorens, “Almunia afirma que las acusaciones de Camacho reflejan un «desequilibrio interno»”, *El País*, 3 de noviembre de 1984.

³⁶³ Noticia, Rodolfo Serrano, “CCOO será consultada, pero no negociará las reformas legislativas que surjan del AES”, *El País*, 13 de noviembre de 1984.

³⁶⁴ AHT, CCOO-CEC, “Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal del día 19-XI-1984”, sig. 001-00048.

³⁶⁵ Noticia, “CCOO estudia la presentación de una querella contra Almunia”, *El País*, 16 de noviembre de 1984; Noticia, “Camacho pide a Almunia que aclare sus acusaciones de «desequilibrio interno»”, *El País*, 30 de noviembre de 1984.

³⁶⁶ Noticia, “Redondo afirma que él resulta incómodo para parte del Gobierno”, *El País*, 7 de diciembre de 1984.

señalar en esas misivas, que no quisiera “pecar de pesado”, lo que venía a evidenciarse con cada paso era la nula o muy escasa voluntad por parte de los restantes firmantes del AES³⁶⁷.

Ni un milímetro pensaba moverse el Ministerio de Trabajo, personificado en la figura de Joaquín Almunia, que tanto le había costado *echar con agua hirviendo* a las Comisiones Obreras, por más que la legalidad tuviera que ser omitida en el “bien común” de desarrollar el AES³⁶⁸. Puesta en marcha toda la maquinaria de cara a continuar a seguir excluyendo a CCOO está vez por la vía jurídica en vez de la vía político-sindical, los servicios jurídicos de Trabajo prepararían una *nota* que se haría pública el 6 de noviembre –que no un *informe* – en donde se venía a concluir en el rechazo a “la pretensión de CCOO de participar en las comisiones de desarrollo del Acuerdo Económico y Social (AES)”. Al igual que había pasado con la vulneración del artículo 134 de la CE en relación a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, la historia se volvía a producir con el mismo entusiasmo por la legalidad vigente. Por si faltaban dudas la confirmación venía de la mano de Rodolfo Serrano el mismo 7 de noviembre:

«Fuente de la Administración y de UGT, sindicato firmante del acuerdo, han reconocido en privado que CCOO debería estar en algunos de los comités, pero que la petición se rechazaría públicamente, ya que cuando salieran los recursos presentados por esta central ante el Tribunal Supremo, algunas de las importantes comisiones ya habría finalizado sus trabajos».

En un alarde de conocimientos jurídicos, la *nota* del Ministerio de Trabajo negaría el carácter contractual del Acuerdo, indicando que ninguna de las comisiones del AES formaría parte de la “estructura administrativa”. He aquí un claro ejemplo de interpretación sesgada donde las hubiera, y con membrete de una Administración Pública para más detalles. A saber, se estaba vulnerando la legislación nacional e internacional con un claro motivo político. “No puede reconocérseles ese derecho, cuando se han negado a firmar el AES. No sería un papel muy airoso para el propio Gobierno, la CEOE y UGT que sí lo han suscrito”, se filtraría de Trabajo a *El País* . En lo que se podía calificar –casi sin riesgo a equivocarse– como una revancha y venganza, se concluía como se había “decidido su exclusión definitiva”, especialmente con todo lo que tuviera que ver con la reforma de la Seguridad Social y la reforma del mercado de trabajo.

Pero en aquella información de Serrano también se revelaría como en la redacción final del AES, se había tenido muy presente el *problema de CCOO* , hasta el punto de redactarse de tal forma –a excepción del artículo 16, referido al Consejo General de Formación– para evitar que apareciera el concepto de “organizaciones empresariales y sindicales más representativas”, y ganar tiempo frente a Comisiones Obreras. También se conocería como de la redacción final a los firmantes hasta su paso por el BOE se había introducido –sin que nadie lo hubiera advertido– la creación de una Comisión de Seguimiento de los 50.000 millones del fondo de inversión pública, en donde se excluía a Comisiones Obreras³⁶⁹. Un astuta jugada que modificaría de tal forma el artículo 7³⁷⁰.

Si la negociación y firma del AES había sido el ejemplo perfecto de la metáfora de las *leyes* y las *salchichas* , su desarrollo se llevaría a cabo sin ningún tipo de escrúpulos tampoco.

³⁶⁷ Noticia, “CCOO insiste en participar en el desarrollo del AES”, *El País* , 6 de noviembre de 1984.

³⁶⁸ Véase lo apuntado en la *nota 190* .

³⁶⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Trabajo rechaza la presencia de CCOO en el desarrollo del AES”, *El País* , 7 de noviembre de 1984.

³⁷⁰ Precisamente, la citada Comisión sería también una de las primeras en convocarse. Por lo poco que se filtraría a la prensa –en un nuevo episodio de silencio altamente significativo– por parte *ABC* se pudo saber lo siguiente: «Por parte de la CEOE participó un miembro de la construcción, lo que hace pensar que los citados pueden ser destinados a este sector. Este hecho enlaza con la entrevista mantenida el pasado día 6 entre José María Cuevas y el Ministro de Obras Públicas, Julián Campo». Noticia, “AES”, *ABC* , 9 de diciembre de 1984.

Tras la contundente como interesada filtración a la prensa de la *nota* de Trabajo, Redondo volvería a mostrar su alto grado de *sinceridad* con Camacho una vez más a través de una carta. Por lo que se conocería también esta ocasión por la prensa, el secretario general de UGT, se mostraría por la labor de estudiar la petición de CCOO de participar en el AES, por más que ya se hubiera dicho en público o en privado que no se cedería. La carta tenía fecha de 8 de noviembre. El día anterior, miércoles 7, *El País* publicaría la misma un día antes. “Inspirados por el deseo de trabajar, deponiendo actitud que tienda a dividirnos en todo aquello que pueda redundar en beneficio de la clase trabajadora”, el Secretario General de UGT invitaba, por lo menos, al entendimiento a ambas fuerzas sindicales. Pero inclusive en aquella carta se reconocía lo obvio: “es evidente que en el AES se hace referencia a órganos de participación, donde la presencia de los sindicatos más representativos está admitida por nuestra Constitución”³⁷¹. De máxima importancia se convertiría el citado tema, hasta llevarlo a la primera página de *Unión*, todo ello en un muy inusual *tono conciliador*³⁷².

Ahora bien, la exclusión política –por más que se quisiera disfrazar la maniobra en términos jurídicos– de Comisiones Obreras chocaría con la realidad judicial. Aunque tan sólo fuera una mera formalidad en términos de procedimiento, en menos de una semana –concretamente los días 8 y 13 de noviembre– se conocería como el Tribunal Supremo había admitido dos de los recursos contenciosos administrativos interpuestos por CCOO para solicitar su inclusión en las comisiones del AES, y frenar así el trabajo de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, respectivamente³⁷³. Las denuncias contra la operación gubernamental también se extenderían a los medios, tras recorrer las calles, los despachos, las salas de prensa, los juzgados...

En un valioso artículo publicado el 12 de noviembre en *El País* de Julián Ariza, acuñaría la expresión “Operación AES”.

«Sería una exageración decir que en la intención originaria del Gobierno, previa a la convocatoria de la negociación, predominaba el interés de colocar a pocos en la disyuntiva de *someterse y sufrir* como consecuencia de una serie de problemas internos, ya que, en contra de lo que se ha venido diciendo, sus acuerdos congresuales definían claramente los puntos a defender en una negociación como la del AES –todos ellos rechazados en el acuerdo–, o negarse a suscribirlo y sufrir los ataques que efectivamente se han producido y seguirán produciéndose. Pero sería también una simpleza no pensar que este dato formaba parte de la *operación AES*».

Para el dirigente de CCOO –del sector carrillista para más datos, y que según *El País* estaba llevando a la radicalización del sindicato– desde la victoria electoral del PSOE, el socialismo español había buscado completar su hegemonía política con la hegemonía sindical, a través del intento de *ugetización* de CCOO, para, a la larga, hacerla innecesaria a esta última central. Dentro de lo que calificaría como *Operación AES*, Ariza llegaría a señalar la irrevocable necesidad que llegaría a tener el Gobierno de conseguir el acuerdo social ya que el riesgo era claro: “beligerancia de UGT contra la patronal” y “unidad de acción entre CCOO y UGT”. Sin embargo, además el AES formaba parte de una estrategia destinada a frenar “la oposición social a la política [y] que permitiera la sustitución de la parte social de su programa de 1982 por este acuerdo”. Al mismo tiempo que garantizar tranquilidad de cara al XXX Congreso del PSOE y al sector dominante del socialismo con las vistas puestas a las elecciones de 1986.

³⁷¹ Noticia, “Redondo pide a Camacho que cesen las actitudes de división sindical”, *El País*, 9 de noviembre de 1984.

³⁷² “Participación y colaboración. Ante las pretensiones de Comisiones Obreras”, en donde se incluía, asimismo, la carta fechada el 8 de noviembre. Todo ello en *Unión*, n° 61, (1984), pp. 1 y 3.

³⁷³ Noticia, “El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso contra el AES de Comisiones Obreras”, *El País*, 8 de noviembre de 1984; Noticia, “El Supremo admite otro recurso de CCOO”, *ABC*, 13 de noviembre de 1984.

Todavía iba más lejos Ariza en su denuncia: “La *operación AES* no ha sido más que una operación política del Gobierno”, con una clara victoria de la CEOE basada en cuatro puntos: “Condicionar la política económica hasta el final de la legislatura, sin avalarla ni comprometerse en sus resultados sobre empleo”; “Obtener mayores beneficios fiscales”; “Conseguir lo que llamaban «libertad absoluta del empresario para contratar y despedir»”; “Iniciar la reforma de la Seguridad Social”. Visto así el riesgo era claro: “la realidad es que caminamos, con las lógicas diferencias de cultura, hacia situaciones sociales y laborales más equiparables a las del siglo XIX”³⁷⁴.

La situación, de nuevo, llegaría a unos límites no previsibles. Volvían a perderse las formas, como cuando CCOO anunciaría: “nos quedamos”. Y ello que, al menos, al Gobierno se le debía presuponer, de entrar, el respecto por toda una serie de *formas y apariencias*, especialmente cuando los socialistas se han propuesto regenerar moralmente a la nación entera. Mientras que Almunia y su equipo andaban enfrascados contra las estadísticas que producía su propio Ministerio –en concreto, contra los datos del Boletín de Estadísticas Laborales– hasta llegar a desautorizarla, afirmaría en aquella ocasión como los “ciudadanos no sabían que hubiera tanto paro, que existía un alto índice de fraude y de trabajo subterráneo, y que ni la Encuesta de Población Activa (EPA) ni el paro registro eran sistemas rigurosos para determinar el paro real”. La *narrativa socialista*, vía el consabido *realismo mágico*, alcanza, de nuevo, así cuotas insospechadas. Con respecto a la exclusión de CCOO y a los consabidos contratiempos que estaban ocasionando, destacaría como “Comisiones Obreras será consultada en todo aquello que signifique un cambio en la legislación, pero no negociará con este sentido aspecto alguno que esté vinculado al Acuerdo Económico y Social”, según recogía Rodolfo Serrano por aquellas fechas. Una manera diplomática de señalar que la exclusión en la práctica continuaría por otras vías y medios. En otro alarde de ingenio –lo que desde la oposición de izquierda a derecha y de derecha a izquierda se tildaría llanamente de prepotencia– declararía el 12 de noviembre: “[C]on CCOO se está a lo que estrictamente exija la ley –«incluso con generosidad, ya que no está clara la obligación de la consulta institucional»”. Por si las cosas no había quedado claras en cuanto al cumplimiento de la legalidad y de la generosidad ministerial, el Ministro de Trabajo afirmaría también que la “participación en las comisiones del AES «son un plus de participación sindical, del que no debe beneficiarse el que no haya firmado»”³⁷⁵. Como recordaría en su momento Agustín Moreno con “el AES, las organizaciones firmantes pusieron en marcha la estrategia de la marginación, sobre el principio de que quien no firma no participa en ningún tipo de negociación ulterior”³⁷⁶.

En similar posición condescendiente se mostraría al día siguiente –el martes 13 de noviembre– de las declaraciones de Almunia, la UGT quien se mostraría favorable a la participación de CCOO por los propios derechos reconocidos como sindicato representativo. UGT así había pasado a convertirse –¿voluntariamente?– en un intérprete más de las leyes del país, a modo de *juez sindical*. “[E]n consecuencia, lo lógico y coherente es que si CCOO desea participar en las comisiones del AES ratifique o se adhiera íntegramente al acuerdo”, se podía leer en un comunicado de la Ejecutiva. Todo ello en un gesto destinado a la galería. Aunque también dejaría muy claro que “en todas aquellas comisiones que suponen la administración, desarrollo, control o aplicación del acuerdo, por pura coherencia, sólo les corresponde estar representados a quienes lo han firmado o se han adherido al mismo”. Declarando, por último, que no tenía por objetivo marginar a CCOO³⁷⁷.

³⁷⁴ ARIZA, Julián, “Algo más, que un desacuerdo”, *El País*, 12 de noviembre de 1984.

³⁷⁵ Noticia, Rodolfo Serrano, “CCOO será consultada, pero no negociará las reformas legislativas que surjan del AES”, *El País*, 13 de noviembre de 1984.

³⁷⁶ MORENO, Agustín, “Prólogo” en COMISIONES OBRERAS. SECRETARIA CONFEERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos...*, op.cit., p. 25.

³⁷⁷ Noticia, “UGT acepta que CCOO participe sólo en algunas comisiones previstas en el AES”, *El País*, 14 de noviembre de 1984.

En la propia reunión de la CEC del propio día 13, la preocupación por el *problema CCOO* frente al AES, ocuparía largas horas de discusión. Lejos de los focos de la prensa, en cualquier caso, se optaría por una doble estrategia previo informe del Gabinete. Así se podía leer en el acta del día 13, como se reconocía como CCOO “tiene derecho propio” a participar en la Comisión de Seguimiento, mientras que, en las restantes, sin excluirla, se “mantendría una postura abierta” ante no pocas dudas jurídicas existentes. Más aún, pues se daban asimismo unas significativas instrucciones de cara a la elaboración del comunicado de prensa que acabamos de ver, dejando muy claro las propias intenciones de la Ejecutiva:

«De igual forma se acuerda elaborar un comunicado de prensa donde se refleje nuestra posición al respecto, dando en dicho comunicado la imagen de querer dejar a CCOO fuera de las Comisiones de Trabajo y señalando a la vez que lo correcto sería que dicha Organización firmará el AES»³⁷⁸.

Comunicados y declaraciones aparte, CCOO seguiría tratando de frenar el desarrollo del AES aprovechando –paradojas de la vida y de la política– la pobre *nota* del Gabinete Jurídico del Ministerio de Trabajo. A partir de donde consideraba, que “la suspensión de esas comisiones no implica perjuicio grave al interés general, ya que según la propia contestación del Ministerio de Trabajo, no forman parte de la estructura organizativa de la Administración”³⁷⁹. Pero consciente desde CCOO de que no podría frenar ni el desarrollo de las comisiones ni de los acuerdos, también se comenzaría a preparar la negociación colectiva del año 1985. Tras la primera toma de posición en las semanas anteriores, en la reunión del CS de CCOO que tendría lugar el 17 de noviembre se empezaría a elaborar ya una estrategia concreta. El recuerdo del AI’83 y del *non nato* AI’84, pero muy especialmente del AMI, influirían de forma poderosa en la estrategia diseñada de cara a evitar, en primer lugar, su marginación. A los dos anteriores elementos debían de añadirse los siguientes: el primero, el riesgo de que UGT, tras ciertos titubeos, pudiera finalmente a aceptar las bandas salariales propuestas por el Gobierno; y en segundo lugar, se tenía más presente el Título II, Capítulo II, artículo 3 del AES en relación al *golpe* recibido a las cláusulas de revisión. De este modo, se solicitaba una banda salarial del 8,75% con la que tan sólo así, según Comisiones Obreras, se podría mantener la capacidad adquisitiva. La política salarial, así, volvía a la primera línea del debate³⁸⁰.

El difícil año 1984 para las Comisiones Obreras finalizaría entre la invisibilidad mediática y su marginación política y jurídica del AES. En medio de los sucesos trágicos de Euskalduna, tanto las movilizaciones de los días 22 y 29 de noviembre convocados parte de CCOO en Madrid, apenas ocuparían lugar alguno en los medios a pesar que en la jueves 22, según cálculos del propio sindicato, participarían unas 10.000 personas contra el desempleo juvenil³⁸¹. La invisibilidad mediática contra la que tanto había luchado las propias Comisiones Obreras cada vez era una realidad más consolidada. En el otro gran flanco, el jurídico, por más que Comisiones Obreras respaldará sus *legitimadas aspiraciones* a través de un valioso informe elaborado por los catedráticos de Derecho del Trabajo Palomeque y Casas, en donde se

³⁷⁸ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 48. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 13 de noviembre de 1984”, sig. 002251-003.

³⁷⁹ Noticia, “Nuevos escritos al Supremo sobre el seguimiento del AES”, *El País*, 16 de noviembre de 1984.

³⁸⁰ Noticia, Rodolfo Serrano, “CCOO teme quedar marginada en la negociación colectiva”, *El País*, 23 de noviembre de 1984; Noticia, “CCOO negociará aumentos salariales en la banda del 9%”, *El País*, 18 de noviembre de 1984. No había finalizado el año y ya se tendría que poner a prueba la estrategia diseñada desde el sindicato de mayoría comunista, ante el inicio de la negociación colectiva en torno al convenio del metal de Barcelona que afectada a 140.000 trabajadores. La patronal catalana –Fomento del Trabajo– no dejaría de incidir en sus respectivas instrucciones de que se negociará en torno a la banda salarial pactada en el AES, aun a riesgo de firmar convenios de eficacia limitada. Daba comienzo la enésima batalla laboral-salarial, con o sin AES. Noticia, E.L. “El convenio del metal de Barcelona pone a prueba la eficacia del Acuerdo Económico y Social”, *El País*, 12 de diciembre de 1984.

³⁸¹ Noticia, “Paro juvenil”, *ABC*, 23 de noviembre de 1984.

aseguraba –lejos de la tesis de Aragón y Lillo³⁸²– como el AES es una norma de “eficacia general”, y por tanto la participación institucional de cara al propio acuerdo social resultaba necesaria la “presencia en tales instancias de cuantas organizaciones sindicales y empresariales ostentan la consideración de más representativas”³⁸³; la realidad es que seguiría siendo ignorada políticamente a la par que el Tribunal Supremo, a finales de aquel año, daría al sindicato un varapalo al desestimar la suspensión contra la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Comisión quien tras constituirse a toda prisa el 22 de octubre tendría su primera sesión de trabajo el 5 de diciembre³⁸⁴.

En resumen, 1984 se convertiría a la postre en uno de los años más complicados tanto para Comisiones Obreras como para el conjunto del movimiento obrero. Los resultados, desde este mismo punto de vista, podían leerse e interpretarse en términos de *derrota*. Pero también sobresalía otra lectura: Comisiones Obrera había tenido que ser derrotada por todos los medios posibles.

Tras la batalla del AES vendrían otras tantas, empezando por la reforma de la Seguridad Social al año siguiente que terminaría conduciendo a la convocatoria de la primera huelga general contra el Gobierno socialista, para la que se llegaría a contar incluso con el apoyo político de UGT. Pero el balance, en ningún caso, podía contemplarse como de positivo. Así lo percibía Marcelino Camacho a poco menos de dos semanas para que se acabara el año en las páginas de *El País*. Precisamente el medio que había desatado una de las campañas más duras en su historia, y, a buen seguro, la más sucia contra un dirigente obrero. Con su característico olfato dedicaría a aquel texto a la reforma de la Seguridad Social. Escribía allí en términos generales: “Se continúa en la política económica del gran capital nacional e internacional, en un ajuste duro de reducción de salarios y de plantillas, en una reconversión salvaje que no se atrevieron a hacer los Gobiernos anteriores”. A lo que se le acompañaba de una nueva reflexión en torno a los costes del AES:

«Los hechos hacen pensar que en el último momento de la discusión del Acuerdo Económico y Social (AES), las grandes compañías de seguros y la banca, por un lado, con la reducción de las pensiones y la creación de fondos privados de pensiones, y otro sector de la patronal, con la eliminación del artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores, asegurando el despido sin trabas en determinados colectivos, han arrancado al Gobierno conquistas importantísimas de los trabajadores».

La conclusión era contundente: “Se hace el trabajo sucio de esa derecha y de ese gran capital”. Y tras traer para el recuerdo una serie de declaraciones de altos dirigentes socialistas con respecto a la flexibilidad del mercado de trabajo, terminaba con tres contundentes reflexiones³⁸⁵: “La seguridad social como conquista humana no está en crisis, pero está en

³⁸² Véase también, LILLO, Enrique, “Razones de la presencia de CCOO en las Comisiones del AES”, *Gaceta Sindical*, nº 33, (1984), pp. 5-6.

³⁸³ Noticia, Félix Monteiro, “Un dictamen jurídico reconoce a CCOO el derecho a participar en algunas comisiones del AES”, *El País*, 9 de diciembre de 1984. En otra parte del informe se llegaba a señalar lo siguiente: «[La presencia de CCOO] en, como mínimo, las cinco comisiones citadas se justifica, pese a no haber sido firmante del AES, de la nación de sindicato más representativo [...] so pena de vulnerar el artículo 28.1. de la Constitución respecto a la actividad de los sindicatos como contenido esencial de la libertad sindical y las exigencias de la mayor representatividad sindical». Un *informe* en donde, por último, no se descartaba llegar a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

³⁸⁴ Noticia, “El Supremo rechaza la suspensión de la comisión de reforma de la Seguridad Social”, *El País*, 21 de diciembre de 1984; Noticia, “CEOE y UGT piden al Gobierno tratamiento global de la Seguridad Social”, *ABC*, 5 de diciembre de 1984.

³⁸⁵ En concreto citaría unas declaraciones de Manuel Chaves a *Cambio 16* efectuadas el 7 de junio de 1984: «El Gobierno [se refería al de entonces, de Calvo-Sotelo] tiende a la flexibilización de plantillas, sustituyendo a los trabajadores fijos por temporales [...]. La aplicación de decretos en este sentido [...] supondría que en pocos años no habrá contratos indefinidos. Además pueden afectar sensiblemente a la

peligro por las concesiones a la patronal de la política económica del Gobierno y del gran capital reflejadas en el Acuerdo Económico y Social”. Segunda: “Hoy lo que podemos afirmar es que ninguna formación socialdemócrata ha hecho una política económica tan de derechas como la del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español”. Y en tercer término: “La política económica actual es una política que corresponde a los intereses generales de los poderes fácticos nacionales e internacionales; es una política antieconómica, antisocial y antisindical, desde el punto de vista de clase y nacional”³⁸⁶.

12.2.3. ¿La CEOE traicionada?

«La firma del Acuerdo suscitó polémica en el propio campo empresarial. Algunos críticos lo consideraron un aval a la política económica del gobierno. En realidad el Acuerdo debe analizarse exclusivamente en clave empresarial; si responde y favorece los intereses de las empresas, teniendo en cuenta si crea o mejora las condiciones objetivas para que éstas desarrollen su actividad. Para conseguir tal objetivo corresponde a la CEOE suscribir acuerdos con los distintos gobiernos y sindicatos».

Ricardo Iglesias, *La concertación social desde la perspectiva de las organizaciones empresariales*³⁸⁷.

Acuerdo tras acuerdo, la patronal desde su refundación en tiempos de transición hasta la llegada de los socialistas no había dejado de conquistar parcelas de poder, tras asumir como un *mal menor* la democracia. Así el AES se convertiría en el mejor y más amplio acuerdo que firmaría la patronal durante toda la década de los ochenta, y uno de los más afines para sus intereses en la historia de la concertación social.

Pese a esta circunstancia reconocida implícitamente desde el Gobierno y explícitamente por UGT, la CEOE se presentaría –a su manera– como un elemento opositor dentro del AES, en una estrategia que le llevaría a desvincularse del mismo con una inusitada rapidez. La historia del ANE se volvía a repetir. La desconfianza frente a un Gobierno socialista influenciada por un claro ideario centrado –también a su manera– en una interpretación singular de la lucha de clases, les conduciría a un proceso de desacreditación política, social y económica del AES, que con tanta renuencia –a pesar de todo lo conquistado– firmarían.

Mientras que las principales macromagnitudes de la economía española no dejaban de arrojar datos negativos en términos de inflación, desempleo... en cambio, las cifras relativas a los excedentes empresariales, a la tasas de explotación, al incremento de la rentas del capital por encima de las del trabajo... no habían hecho más que mejorar desde la llegada de los socialistas, gracias, en gran medida, a la dirección y sentido de su política económica. Cuando inclusive desde *ABC* se había reconocido esta circunstancia y todavía más se había dejado el oportuno espacio para que se diera rienda suelta a la inversión privada, la actitud de los empresarios españoles no se movería ni un centímetro a la hora de la verdad. A saber: lo que se conocería, en medios socialistas y progresistas, como el “absentismo inversor”. Su mayor evidencia, la continuada destrucción de empleo.

Mes y medio después de firmarse el AES se conocerían los datos del III Trimestre de 1984 de la EPA: 2.710.000 personas se encontraban desempleadas, lo que significaba 65.000 nuevos parados. En tres meses, de hecho, tan sólo se crearían 2.000 empleos de los que se desconocía a su vez su duración temporal. En total, 20,54% de la población activa se

afiliación sindical y a los cuadros sindicales, que ‘pueden verse marginados’». CAMACHO, Marcelino, “La seguridad social de la crisis y la crisis de la Seguridad Social”, *El País*, 12 de diciembre de 1984.

³⁸⁶ CAMACHO, Marcelino, “La seguridad social de la crisis y la crisis de la Seguridad Social”, *El País*, 12 de diciembre de 1984.

³⁸⁷ IGLESIAS, Rodrigo, “La concertación social desde la perspectivas de las organizaciones empresariales” ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos..., op.cit.*, p. 163.

encontraba parada. Por cierto, en aquella ocasión la generación del *baby boom* –que a tenor de lo que decían los expertos, aparecía y desaparecía cuando más convenía de las estadísticas– figuraba como la principal responsable, más allá de las consabidas sospechas contra la fiabilidad de la propia EPA, sin olvidarnos de la extendida *manía* de los trabajadores de refugiarse en la economía sumergida. Conclusión, ni se había tocado fondo en la destrucción de empleo, ni existía señal alguna de confianza –ese elemento tan subjetivo como imprescindible para los empresarios– que ayudará a *reanimar* el mercado, con o sin flexibilidad, con o sin despido libre³⁸⁸. La tesis del *absentismo inversor* ganaba adeptos frente a los siempre augurios catastrofistas de la CEOE.

El siempre perseguido y denigrado empresario español –tal y como les ha gustado presentarse por regla general– empezaría, en breve, a tener ligeras sospechas de que se estaba tramando una conspiración en relación a los compromisos alcanzados. ¿La CEOE *traicionada* por un Gobierno socialista? Formulada la pregunta así, pocas dudas podrían tenerse en un principio, pero como hemos visto la historia de las relaciones entre el poder político y el poder económico en estos años sería bastante más diferente de lo que vienen a presuponer ciertos *imaginarios colectivos comunes*.

Así pues, tal pregunta puede llevar a más de un engaño. En realidad, se trataría tan sólo de lecturas divergentes entre los diferentes firmantes del AES. Lo que, a su vez, dejaba varios interrogantes sin contestar: ¿de qué habían servido tantas reuniones entre sindicalistas y patronal y entre sus propios técnicos? ¿Cómo y por qué se habían redactado cuestiones aparentemente no problemáticas a través de confusos textos que podían generar tantos problemas? He aquí lo que Corcuera calificaría como esas *expresiones que son un encanto*.

Varios serían los frentes que, en breve, se abrirían. El primero lo constituiría la lectura del confuso artículo 4 del Título II del AES, relativo a las cláusulas de revisión salarial. Un asunto que iba mucho más allá de la banda salarial de entre el 5,5 al 7,5%, más teniendo en cuenta las siempre “certeras” previsiones del Gobierno al respecto. Aquí el fantasma del AI’83 volvía a reaparecer, pues como informaba Rodolfo Serrano con la fórmula pactada –de difícil interpretación– “las empresas conseguirían un fuerte ahorro con esta fórmula”³⁸⁹. Con UGT, además, sin nada que perder y dispuesta a explotar todas y cada una de las posibilidades de esta parte del acuerdo que hasta entonces –había “pasado inadvertido”– se involucraría que en las “clausulas del AES permiten romper por arriba la banda salarial pactada en el acuerdo para 1985 y 1986”, según el incremento de la productividad.

Tampoco se puede obviar que tal cuestión figuraba como una cuestión de primer orden para la patronal, que es quien, a fin de cuentas, confeccionaba las nóminas a finales del mes. Todo tenía sus límites. No estaría por labor ni de ceder ni de negociar³⁹⁰. Más lenta de lo habitual, desde la CEOE se tardaría en contestar a las pretensiones ugetistas. Mediante una *circular* se buscaría de finiquitar cualquier tipo de confusión o mejor dicho de posible discusión. En la misma se fijaría un límite máximo del 7,5% en la banda salarial que no podría romperse de ninguna de las maneras, fueran cuales fueran las circunstancias de cada empresa³⁹¹.

Después de la inicial falta de reflejos, la CEOE recompondría a toda velocidad su posición, de cara a plantar batalla frente el proceso de negociación colectiva para el siguiente

³⁸⁸ Noticia, “El número de parados ascendió en el tercer trimestre a 271.400 personas, con un aumento de 65.000 desempleados”, *El País*, 29 de noviembre de 1984.

³⁸⁹ Noticia, Rodolfo Serrano, “La revisión salarial del AES «castiga» a los trabajadores que pacten subidas en convenio por debajo de la inflación”, *El País*, 4 de noviembre de 1984.

³⁹⁰ Noticia, Rodolfo Serrano y Gustavo Matías, “Los topes salariales fijados en el AES podrán ser superados por pactos para aumentar la productividad”, *El País*, 16 de diciembre de 1984.

³⁹¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Los pactos sobre productividad no pueden romper la banda salarial, según la CEOE”, *El País*, 20 de diciembre de 1984.

año, más teniendo en cuenta que las Comisiones Obreras pensaban en este terreno negociar con toda su fuerza. En el documento sobre las *instrucciones* confeccionadas por la patronal de cara a seguir a tal proceso –y por lo que se pudo saber a través a la prensa– en un gesto de fortaleza solicitaba a sus asociados no incluir en la negociación, bajo ningún pretexto –de “carácter imperativo” calificaría tales instrucciones Rodolfo Serrano– temas fundamentales como la “jornada, creación de empleo y derechos sindicales”, en tanto estaban incluidos en el AES. Objetivo: vaciar de contenido la negociación colectiva, lo que conllevaba –de ser así– debilitar la capacidad de negociación y presión –y viceversa– de las Secciones y Comités de Empresa, centro de trabajo por centro de trabajo. También en aquel documento, se recordaría, entre otras cuestiones, que no se debatiera nada en tema de derechos sindicales en tanto estaba recurrida ante el Constitucional la LOLS³⁹².

El viernes 9 de noviembre de 1984 se publicaba en el BOE el primer y más amplio paquete del desarrollo legislativo de la RET’84: RD 1989/1984, RD 1991/1984³⁹³; RD 1992/1984³⁹⁴ y días después aparecía el RD 2104/1984. Aunque en los siguientes años se publicarían otras tantas medidas –entre otras el RD 799/1984³⁹⁵, RD 1044/1985³⁹⁶, RD 1809/1986³⁹⁷...– se completaba así la gran reforma del mercado de trabajo de 1983 y 1984 una vez aprobada la Ley 32/1984³⁹⁸. En todos estos años de gran estabilidad normativa –la más amplia que se conoce desde la aprobación del ET en marzo de 1980– no se tocarían los mecanismos de salida del mercado en sus aspectos fundamentales, ni se cedería a las pretensiones de la patronal en materia del mal denominado “despido libre” que existía, en realidad, desde hacía años³⁹⁹. De eso se encargarían las reformas de 1992 y 1994 principalmente.

El citado *pack legislativo* laboral –como la principal aportación de los socialistas españoles a la “causa” de la flexibilización en la “década del cambio”– no iba a constituir una noticia de primer orden durante el mes de noviembre de 1984, pero sí certificaría que las pretensiones liberales de la CEOE con respecto a la flexibilización del ordenamiento jurídico

³⁹² Noticia, Rodolfo Serrano, “La patronal no negociará en los convenios la jornada, los derechos sindicales y el empleo”, *El País*, 21 de diciembre de 1984.

³⁹³ Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, *por el que se regulan el contrato a tiempo parcial, el contrato de relevo y la jubilación parcial* [B.O.E. 9 de noviembre de 1984].

³⁹⁴ Real Decreto 1992/1984, de 31 de octubre, *por el que se regulan los contratos en prácticas y para la formación* [B.O.E. 9 de noviembre].

³⁹⁵ Real Decreto 799/1985, de 25 de mayo, *por el que se incentiva la contratación de jóvenes trabajadores y se extiende esta medida a determinados programas y contratos vigentes* [B.O.E. 1 de junio de 1985].

³⁹⁶ Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, *por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importante, como medida de fomento del empleo* [B.O.E. 2 de julio de 1985].

³⁹⁷ Real Decreto 1809/1986, de 29 de junio, *por el que se modifica la regulación de los trabajos de colaboración social contenida en el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio* [B.O.E. 6 de septiembre de 1986].

³⁹⁸ Hasta abril de 1985 no se publicaría su reglamento afectando, de forma grave, la utilización de las nuevas formulas contractuales. Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, *por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección al Desempleo*.

³⁹⁹ Noticia, “Mayor beligerancia del Fondo de Garantía Salarial al fraude en sus prestaciones”, *El País*, 10 de noviembre de 1984. Todo ello teniendo presente que el propio FOGASA tenía un enorme agujero financiero de cerca de cincuenta y cinco mil millones de pesetas. Véase, Noticia, Rodolfo Serrano, “El Fondo de Garantía Salarial tendrá un «agujero» de 56.000 millones de pesetas al finalizar 1984”, *El País*, 9 de agosto de 1984.

laboral, se verían cortocircuitadas muy parcialmente⁴⁰⁰. De cualquier de las formas, el citado *pack legislativo* supondría el “gran salto adelante” en la flexibilización del SERL. Por cierto, se debe tener más que presente que tras la firma del mismo AES, apenas se tendrían noticias acerca de la última fase de negociación de este conjunto de reales decretos, que como hemos visto se publicarían en el Boletín Oficial del Estado con la mayor prontitud posible.

Por tanto, de nuevo, nos movemos en un terreno resbaladizo, pues lo que sucedería con la Comisión destinada a desarrollar el artículo 15 del AES, incluido en su Capítulo VI, rara vez trascendería a los medios de comunicación. A lo que ha de añadirse la escasa documentación que se ha podido localizar al respecto. Inclusive es inferior con respecto a otros procesos similares. No obstante, la publicación oficial, al menos, de los tres primeros reales decretos – generosos, en extremo, en términos de flexibilidad laboral y de ampliación fáctica de contratación temporal– supondrían un duro golpe a las ya desinfladas *esperanzas* de la patronal de que el Ejecutivo pudiera introducir algún elemento nuevo a última hora. Y en este caso –si se puede afirmar– que la CEOE se sentiría engañada en una primera fase, para más tarde sentirse traicionada. Vería en aquellas figuras contractuales los “viejos demonios” del ordenamiento jurídico-laboral español: falta de libertad, falta de flexibilidad y sobre todo mucha rigidez. Junto con un elemento que ni siquiera ella podía denunciar públicamente: un mínimo conjunto de derechos protectores en el afán iluso del legislador de que con los mismos se pudiera evitar su uso fraudulento. Pero tras el *disgusto inicial* del 9 de noviembre se abriría una pequeña puerta a la “racionalidad económica”.

Bajado el telón de la negociación y de la consiguiente escenificación del AES, todavía hoy no sabemos con exactitud cómo y de qué forma se procedió a la elaboración y negociación del futuro *pack legislativo* que desarrollaría la RET '84. Conocemos, fehacientemente, que tanto en julio –por lo menos, desde el 23– como el 4 de octubre –un documento que no se ha podido localizar por ninguna vía– desde Trabajo se entregarían sendos borradores de los que ya hemos dejado constancia. Ahora bien, ¿qué sucedió desde el día posterior a la firma del AES hasta que se aprobaron en Consejo de Ministros un 17 de octubre el RD 1989/1984, un 31 de octubre el RD 1991/1984 y también el RD 1992/1982 y ya un 21 de noviembre el RD 2104/1984? Insistimos, se desconoce en términos generales lo que pudo acontecer⁴⁰¹. Tampoco se puede dilucidar a qué tipo de razones obedeció a que el RD 1989/1984 fuera aprobado en Consejo de Ministros un 17 de octubre y fuera publicado en el BOE más de veinte días después, en concreto un 9 de noviembre. Y dicho esto, ¿hubo una última ronda de negociaciones desde Trabajo con CEOE y UGT? Al menos, en relación al RD 2104/1984 –el más favorable a los intereses de la patronal– parece que sí.

Vaya, por delante, que mientras que *El País* optaría por un bajo perfil informativo al respecto, desde ABC, en menos de dos semanas, se publicarían hasta tres noticias sobre los alcances del citado *pack legislativo*⁴⁰². Mientras que los *ecos* de la batalla por el despido libre resonaban aún, se sabe gracias a un *informe interno* de la Secretaría de Acción Institucional de UGT fechado el 1 de diciembre, que a,

«finales de octubre se mantuvo una reunión en el Mº [Ministerio] a la que asistieron el Secretario de Trabajo, Ignacio Pérez infante, Aurora Domínguez, José María Zufiaur, Rafael Nogales y Sergio Santillán. En ella se habló de diversas propuestas de modificación del Decreto

⁴⁰⁰ Noticia, “Regulada la contratación temporal, a tiempo parcial y en prácticas”, *El País*, 11 de noviembre de 1984.

⁴⁰¹ El principal protagonista de estos episodios optaría en sus *memorias políticas* por omitir, de forma directa, todas estas cuestiones entre confundidos de fechas y mezcla de leyes y proyectos legislativos. Véase en el Capítulo 10, *nota 112*.

⁴⁰² Noticia, Amancio Fernández y Miguel Villatoro, “Nuevas normas sobre contratación temporal para estimular la creación de empleo”, *ABC*, 13 de octubre de 1984; Noticia, “Próxima aprobación de los «contratos de relevo»”, *ABC*, 24 de octubre de 1984; Noticia, “Los contratos en prácticas y para la formación gozarán de importantes bonificaciones en la Seguridad Social”, *ABC*, 26 de octubre de 1984; y, Noticia, “Despido libre, o despido fácil, barato y rápido”, *El país*, 14 de octubre de 1984.

[2104/1984] por parte de UGT [...] pero en ningún momento de la supresión del párrafo 3º. Sobre el caso de apertura de un nuevo centro de trabajo se expuso por parte del Mº, pero ante nuestro rechazo, se aceptó por ellos el criterio de que no se incluiría»⁴⁰³.

¿Qué venía a señalar el citado punto 3º con el que en realidad era el punto 5.3 del proyecto de borrador aprobado? En la primera versión del citado *pack legislativo* de julio de 1984, se incluirían dos puntos de cara evitar su utilización fraudulenta así como toda una serie de salvedades clásicas en este tipo de normativa. Aspectos de mínimos, en realidad, pero que desaparecían pese a lo acordado entre UGT y Trabajo una vez publicado en el BOE, potenciando la posibilidad de mayor uso –lícito pero también ilícito– de la nueva figura⁴⁰⁴. Recuérdese además que desde un principio, en noviembre de 1983, la UGT solo aceptaría esta figura contractual, con una serie de requisitos como el de seguir estudiando su puesta en marcha, una vez asegurado lo siguiente: “Por lo tanto, se ha convenido que hasta tanto no se establezca una regulación de estos contratos [...] no se utilicen”⁴⁰⁵.

Lo último que se conoce, vía documental, es que el “21 de noviembre pasado se nos entregó el texto [a los miembros de la Comisión de Legislación Laboral de UGT del AES] que ese mismo día iba a ser aprobado en el Consejo de Ministros” y en donde se incluían los cambios citados previsto desde Trabajo⁴⁰⁶. Es decir, no serían escuchadas las reclamaciones de UGT. Por lo demás, ¿hubo intermediación o reunión con la CEOE en esos mismos días? ¿Por qué el Ministerio se *echó para atrás* de sus compromisos con UGT tras la firma del AES? O directamente, ¿cuáles fueron las causas de la alteración de los borradores iniciales? Observando lo que se indica en el artículo 5 del RD 2104/1984, puede intuirse una clara inclinación por las posturas patronales como analizaremos. Entonces, ¿sería esta una concesión ante las parciales y tibias limitaciones introducidas en las otras figuras, buscando a través de esta vía una expansión fáctica de la contratación temporal por medio, a su vez, de una vía secundaria menos visible? O

⁴⁰³ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Informe sobre la regulación del contrato de trabajo por lanzamiento de nueva actividad”, Madrid, 1 de diciembre de 1984, sig. AI-195-05. Más tarde, primero, Redondo, reconocería: «Nosotros éramos partidarios de una contratación temporal puramente causal, lo que pasa es que luego el Ministro de Trabajo modificó con una pequeña trampa, permitiendo que se llegara a situaciones de temporalidad insostenibles». Y asimismo Zufiaur declararía: «[El fomento de la contratación temporal] era como una especie de legislación excepcional [...] sin perder la causalidad de la relación contractual y sin perder el contrato estable como contrato tipo [...]». Es más tarde en el 84 cuando ya, en contra de la UGT, que se fue mucho más allá de lo pactado, se eliminó la causalidad, se metió el contrato de lanzamiento de nueva actividad y una serie de cuestiones ya en una posición no compartida, por lo menos de fondo». Ambos testimonios en, CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, op.cit., pp. 190-191 nota 48.

⁴⁰⁴ Literalmente se decía: «3º. Las empresas no podrá celebrar este tipo de contratos en los siguientes casos: a) Cuando la nueva actividad suponga meramente la continuación de las actividades realizadas con anterioridad. b) Cuando hayan amortizado puestos de trabajo por despido improcedente, expediente de regulación de empleo o por la causa objetiva prevista en el apartado c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores dentro del año inmediatamente anterior a la fecha del lanzamiento de la nueva actividad o de la contratación, salvo que acrediten que las necesidades derivadas de la nueva actividad no hubieran podido realizarse con los trabajadores afectados por dichas causas de extinción. En caso contrario estos trabajadores tendrán prioridad absoluta, para la nueva contratación, que, en este caso será de la misma naturaleza que la extinguida». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1984, sig. AI-14-02. En concreto, se trataba del punto originario del artículo 5.3 del entonces llamado “Anteproyecto de Real Decreto, sobre duración de contrato de trabajo”.

⁴⁰⁵ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Aspectos fundamentales del principio de acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Materia de contratación”, noviembre de 1983?, sig. AI-195-05.

⁴⁰⁶ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Las modificaciones introducidas en el Real Decreto que regula el contrato de trabajo por lanzamiento nueva actividad en relación con lo pactado con el Ministerio de Trabajo”, noviembre de 1984?, sig. AI-195-02.

acaso, ¿se trataba de una posible medida compensatoria de futuro ante la seguridad de que no se cedería a las pretensiones de la CEOE en relación al “despido libre”?

Lo único que hoy podemos afirmar es que tal decisión de Trabajo enfurecería a UGT, como lo expresaría por carta Redondo a González a finales de aquel año como tiempo tendremos de ver, aunque también se ha de destacar que, en una primera etapa de casi un mes, se mantendría un cierto silencio al respecto⁴⁰⁷. No obstante, en otro *informe interno* ya citado de la propia Secretaría de Acción Institucional se concluiría de la siguiente forma:

«Estas modificaciones introducidas a última hora, que alteran la naturaleza, contenido y límite de estos contratos, sin ninguna comunicación de ello se iba a producir, después de haber estado negociando durante meses y en mantener una postura de apoyo en este tipo de contratación, desvirtúa por completo este esfuerzo negociador y descalifica a unos interlocutores que no quieren mantener los acuerdos a los que se ha llegado después de duras y extensas negociaciones no exentas de dificultades»⁴⁰⁸.

Que la CEOE atacara al Gobierno con cualquier excusa no resultaba anormal en la situación diaria de tensión, por más que la patronal nunca se hubiera llegado a imaginar, en su día, que un Ejecutivo socialista llegaría a aplicar la política que estaba llevando adelante. “Yo más bien creo que el que se ha reconvertido es el PSOE, desde entonces hasta ahora. Nosotros estamos donde estábamos y ellos no. Por eso, no dudo de que, si fuera necesario, volveríamos a usar en otra ocasión la manzana y el gusano y lo que haga falta, por, según la guerra, así será nuestro fusil”. Las palabras anteriores corresponden a José María Cuevas. Una amenaza nada velada de volver situación de crispación con la que tratarían de emponzoñar –sin éxito alguno– las últimas elecciones andaluzas. El socialismo no dejaba de ser un enemigo declarado por más que se hubiera reconvertido a su *causa*. Siempre guiado por su fundamentalismo empresarial, el mismo presidente de la CEOE también afirmaría el mismo 17 de noviembre: “aunque no lo parezca, hacen su política, y si no, que se lo pregunten a los empresarios, que lo notan en los impuestos y en tantas cosas”⁴⁰⁹.

Aquellas declaraciones se realizarían una semana después de publicarse en el BOE el desarrollo legislativo de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, una vez comprobada que su *política de chantaje* con respecto a la contratación temporal también tenía sus límites que no podía controlar: el propio Boletín Oficial del Estado. Por esta misma vía, igualmente se constaría como a la patronal, junto con el conjunto de la derecha política, siempre les parecía insuficiente y limitada la reforma del mercado de trabajo de noviembre 1983. Un criterio que como hemos visto, sería asumido, a corto plazo, por el propio Ejecutivo con Trabajo a la cabeza. Especialmente frustrante resultaría que los decretos sobre contratación que entrarían en vigor el sábado 10 de noviembre contuvieran mecanismos de protección como el reflejado en el punto 3.4 del RD 1989/1984 en donde se establecían un periodo de indemnización de 12 días por año –una minucia comparado con un despido normal, procedente–.

Pero esta *intolerable* situación –o afrenta llegado el caso– que se había dado con respecto al RD 1989/1984, en cualquier caso, sería subsanada con el resto de las nuevas figuras contractuales, en donde alcanzaría – pese a las declaraciones de turno– buena parte de sus objetivos. Así pues, no protestarían con tanto entusiasmo frente a la redacción del real decreto sobre los contratos de formación y de prácticas. Sin duda, una de las vías principales de la posterior precarización del SERL, hasta llegar a convertir a España en uno de los países con

⁴⁰⁷ Véase la omisión de esta cuestión, de forma palpable, en el último número de *Unión* de 1984, en donde en el análisis de lo desarrollo tras al AES no aparecería esta figura. “AES: puntualizaciones de una polémica”, *Unión*, nº 62, (1984), pp. 6-7.

⁴⁰⁸ AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Institucional, “Las modificaciones introducidas en el Real Decreto que regula el contrato de trabajo por lanzamiento nueva actividad en relación con lo pactado con el Ministerio de Trabajo”, noviembre de 1984?, sig. AI-195-02.

⁴⁰⁹ Noticia, “La CEOE puede volver a la campaña de «la manzana y el gusano», según Cuevas”, *El País*, 17 de noviembre de 1984.

uno de los ordenamientos más flexibles a nivel mundial –y por supuesto a nivel europeo– tal y como reconocerían en numerosas ocasiones el FMI o el BM. Un hecho que no escaparía al siempre astuto José María Cuevas, quien llegaría a declarar lo siguiente: “en facilidades para la contratación estamos muy por encima de Europa”. De hecho, como se recogería en una información de *El País* el objetivo del Ministerio con ese *gran salto adelante* sería “eliminar los recelos, sobre todo del pequeño y mediano empresario, a ampliar sus plantillas”⁴¹⁰.

Pero de lo que no olvidaría la patronal sería de la *promesa* –como no dejarían de repetir insistentemente– que el Presidente del Gobierno les haría en relación al despido libre en el *tiempo de descuento* de la negociación del AES. Entre otros muchos recordatorios hasta finalizar 1984, uno de los más *sonados* sería el de Ángel Panero –presidente de la CEPYME y miembro de la patronal en la comisión negociadora del AES– quien en una conferencia en la APIL señalaría como “independientemente de lo que cada uno quiere entender en el texto del acuerdo, el espíritu de lo firmado era el facilitar la flexibilización de las plantillas”. Advirtiendo –aunque lejos de la maestría de Cuevas–: “Y si dentro de seis meses, la situación sigue igual, si no se ha cumplido esta promesa, los empresarios nos sentiremos defraudados”. Una amenaza que dadas las circunstancias se podía traducir en un aviso de que se continuaría con su política de *no inversión económica*. El lugar, el interprete y quizás la repetitiva insistencia llevaría, por una vez, a Eduardo Sotillos a intervenir para negar la promesa del propio González. Un portavoz del Gobierno recordado por sus frecuentes “metedura de pata”, como en aquella ocasión al señalar que Panadero no conocía lo que se había acordado, cuando precisamente el mismo prácticamente asistiría a todas y cada una de las reuniones oficiales, secretas, restringidas, técnicas...⁴¹¹.

Lo que tampoco ayudaría a aclarar el panorama de lo que se pactó –con espíritu o sin él– serían los cada vez más titubeos de UGT, en boca de su propio Secretario General, Nicolás Redondo al respecto. Sobre todo cuando afirmaría en la inauguración de la IV Conferencia de la Juventud de UGT que “no creía que hubiera un acuerdo secreto entre el Gobierno y la patronal para la implantación del despido libre”. Para a continuación señalar: “que si lo hubiera, la UGT seguiría defendiendo «con intransigencia» la situación actual”⁴¹². Y llegados aquí, al menos, hemos aprendido a desconfiar –en alguna que otra ocasión– de la veracidad de lo que políticos y sindicalistas señalarían en público. Y en este caso, las anteriores palabras pueden ser un pequeño ejemplo de lo dicho, más aún cuando se ha dejado constatado como transcurrió la redacción final del texto de marras.

Objetivamente, la patronal no podía tener mayores quejas con el Gobierno socialista si el asunto se abordaba desde una distancia temporal debida. A cada paso reformista había ido arañando conquistas, pero sobre todo declaraciones de Felipe González que durante 1984, quien dejaría bien asentada su *fe* en la “lógica liberal”. Un profundo convencimiento que volvería a resonar durante el transcurso del XXX Congreso socialista celebrado a mediados de diciembre de 1984, cuando señalaría su prioridad por la *eficacia económica* antes que por la *eficacia social*. Cuevas no dejaría pasar tan magnífica ocasión en esta relación de *amor-odio* que mantenía con el socialismo en su conjunto antes que con el Presidente del Gobierno: “Para los

⁴¹⁰ Noticia, Gustavo Matías, “Las nuevas normas sobre contratos temporales excluyen las principales peticiones de la CEOE”, *El País*, 12 de noviembre, 1984; Noticia, Rodolfo Serrano, “Contratos a buen precio”, *El País*, 9 de diciembre de 1984.

⁴¹¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “El Gobierno niega que prometiera facilitar el despido a cambio de la firma del AES”, *El País*, 6 de diciembre de 1984.

⁴¹² Noticia, “Las Juventudes de UGT, a favor de la contratación temporal”, *El País*, 2 de noviembre de 1984. Un mes después el asunto seguiría rondando la cabeza de no pocos sindicalistas de UGT, tal y como destacaba Rodolfo Serrano: «En el primero de los puntos [mercado de trabajo] muchos sindicalistas han confesado que darían cualquier cosa por saber qué fue lo que realmente prometió Felipe González al presidente de la CEOE, José María Cuevas, para que firmara el AES». Noticia, Rodolfo Serrano, “Nicolás Redondo se enfrenta al PSOE para impedir que el Gobierno instrumentalice el sindicato”, *El País*, 1 de diciembre de 1984.

empresarios es alentadora y reconfortante esta afirmación del presidente del Gobierno hecha en un acto tan importante como es el congreso de su partido”. Pero ni con esas Cuevas declararía “oficialmente” –si así se puede señalar– que España era un país propicio para invertir. Al contrario, se mostraría comprensivo con los empresarios que trabajan en la economía sumergida. O sin tampoco muy lejos hablaría en los siguientes términos: “resulta más rentable económicamente no hacer nada que arriesgar la rentabilidad financiera en inversiones aventuradas”⁴¹³.

De hecho, el propio XXX Congreso del PSOE se convertirá, a la postre, en el de la confirmación del fin de cualquier veleidad socialdemócrata. Tan sólo hace falta acudir a su ponencia económica. De esta forma, los encargados de elaborar la misma cuidarían en extremo la redacción, de cara a evitar cualquier posible roce o doble interpretación. Una forma de proceder que, inclusive, no escaparía a la atenta mirada de *El País*. El giro que se venía acometiendo progresivamente desde el XXVIII Congreso extraordinario, acelerado posteriormente con el XXIX de 1981, tomaba aquí un *rumbo fijo*. No sólo se *santificaría* el camino emprendido –el crecimiento económico por encima de cualquier otra consideración– sino que se evitaría –mediante el conocido sistema de mayorías y minorías del socialismo español– que saliera adelante un enmienda en donde se denunciaba abiertamente *absentismo inversor* –“denunciar esta insolidaria actitud y promover el protagonismo del sector público”–. Todo un mensaje de *confianza* y de *gratitud* hacia la patronal⁴¹⁴. De “ratificación importante” la CEOE calificaría el XXX Congreso socialista.

A la hora del balance de aquel durísimo año ochenta y cuatro, sin duda, para la patronal había sido en extremo negativo por la oleada conflictiva obrera: en los once primeros meses –según los fiables datos de la propia CEOE– se habían perdido 115 millones de horas de trabajos que aunque estaban lejos de los de 1979 –175 millones– era superior a la de los años 1978 –110 millones– o 1981 –50 millones–. En la última rueda de prensa del aquel accidentado año 1984, el propio Cuevas denunciaría el incumplimiento del AES tanto por los datos que se manejaban como por la constatación de que en las comisiones “no se avanza nada”, marcándose como reto dos objetivos en base a lo firmado en el AES: “desarrollar el AES y el empleo juvenil”. Esto último no dejaba de ser más que una obsesión –prácticamente “compulsiva”– que evidenciaba como a pesar de las claras ventajas obtenidas con las diferentes figuras contractuales desarrolladas, las mismas estaban lejos de las aspiraciones de máximos de la propia CEOE. El eterno llamamiento a un *nuevo giro flexibilizador* volvía a la primera línea de la agenda política de la patronal. Sería, precisamente, Jiménez Aguilar quien para 1985 desearía, a su vez, públicamente mayores facilidades para la contratación temporal antes que creación de empleo⁴¹⁵. Por cierto, el mismo representante de la patronal –quien no ganaba para lamentos– denunciaría como en 1984 se había producido un considerable subida salarial –por más que todos y cada uno de los datos dijeran lo contrario–. Tras calcular como la subida sería en torno a los 7,6 puntos, no dejaría pasar la oportunidad para dejar claro el ideario de la CEOE con respecto a la culpabilización de los salarios:

«sabemos que el incremento real es mucho mayor, pero esta cifra en tres puntos como consecuencia de la estructura arcaica de los salarios, basada en deslizamientos, flecos, derivas, ha tenido también una importante responsabilidad la aplicación de la reducción de la jornada a cuarenta horas»⁴¹⁶.

⁴¹³ Noticia, “Felipe González es un gran converso, según el presidente de la CEOE”, *El País*, 15 de diciembre de 1984.

⁴¹⁴ Noticia, Gustavo Matías, “El PSOE intenta acelerar el ritmo y la naturaleza de los cambios económicos a partir de la política actual del Gobierno”, *El País*, 19 de diciembre de 1984.

⁴¹⁵ Noticia, Gustavo Matías, “La CEOE opina que impuestos y déficit público incumplen el AES y amenazan la inversión”, *El País*, 29 de diciembre de 1984.

⁴¹⁶ Noticia, E.L.O., “Desarrollo del AES e impulso del empleo juvenil, obsesiones de la CEOE para 1985”, *ABC*, 29 de diciembre de 1984.

Medio año después la CEOE y CEPYME lanzarían un duro órdago contra el AES y el propio Gobierno. Nos movemos a finales ya de julio de 1985. El primero de otros tantos, hasta cuestionar por completo el propio acuerdo social y poco a poco ir desenganchándose del mismo como había sucedido con el propio ANE. Por medio de la llamada “Declaración de CEOE y CEPYME ante los incumplimientos del AES y la situación en que se encuentra el acuerdo”, se hablaría de “graves incumplimientos” por parte del Gobierno, para interrogarse si había llegado el momento de cuestionar hasta la propia “subsistencia misma de la concertación”.

Pero en realidad aquel documento venía a ser la respuesta tantas veces esperada por parte de la patronal acerca de los compromisos sobre el *despido libre*. De hecho, esperaba un par de meses más de lo anunciado. Asimismo, y por más en la citada *declaración* se denunciaría, entre otras no pocas cuestiones, de cómo se había eludido la “Reforma de la Seguridad Social”, a partir del bloqueo de la “Comisión Tripartita desde el 4 de abril”, y en medio de graves acusaciones –aunque basadas solo en suposiciones y no hechos– de supuestas negociaciones bilaterales entre Gobierno y UGT al respecto, incluido todo ello en un largo listado de agravios de nueve puntos, el principal y más importante se encontraba en el segundo, en donde se afirmaba:

«Bloquear la reforma de la legislación laboral comprometida en el artículo 17 del AES, de modo que no se ha cumplido la voluntad manifestada por el Gobierno de adaptar la legislación española a las normas comunitarias y a las habituales en los Estados Miembros de la CEE, sobre todo una vez firmado el Tratado de Adhesión».

Cierto era que entonces había pasado el tiempo pactado. En concreto, se había cumplido el plazo previsto el 10 de abril. Y, lógicamente, no se había producido todavía una respuesta oficiosa por parte del Ejecutivo con el apoyo del “silencio cómplice” de la UGT. En esta muy delicada tesitura –que, en todo caso, era el escenario más contemplado por la propia patronal desde que firmaría en AES en octubre de 1984– la CEOE también dejaría el siguiente recado: “El Gobierno en solitario ha definido una política económica que no ofrece una garantía ni seguridad respecto del control y reducción del gasto público, lo que hará inútiles los sacrificios de empresarios y trabajadores efectuados durante los últimos años”. Tras este último amargado grito, se exigía respuesta a lo anterior al Presidente.

Ni un día tardaría en contestar Almunia a Cuevas por “encargo del Presidente del Gobierno”. La fecha exacta: el día 31 de julio de 1985. En una muy dura carta, en la que se negaría todas y cada una de las acusaciones de la patronal, sin embargo, podemos localizar el *nuevo* y definitivo *argumentario* oficial/institucional sobre el tantas veces discutido artículo 17 del AES:

«La adaptación de la legislación laboral española a las normas comunitarias y a las habituales en los países miembros de la CEE es, lógicamente, algo mucho más amplio que la mera aplicación de la Directiva de febrero [sic] [1975], por lo cual mal se puede afirmar que el Gobierno ha abandonado su voluntad de proceder a dicha adaptación. En todo caso, el Tratado de Adhesión y sus anexos confirman que nuestra legislación en materia de despidos colectivos cumple totalmente lo previsto en dicha Directiva, cosa que se ha manifestado repetidas veces desde el momento de la firma del AES, y que ahora se ve ratificada por el Tratado»⁴¹⁷.

Así concluía la muy larga como interesada polémica sobre el *dichoso* artículo diecisiete del Acuerdo Económico y Social⁴¹⁸. ¿Tradición a la CEOE? O ¿simple y puro intento de

⁴¹⁷ Véase lo apuntado al respecto por, IGLESÍAS, “La concertación social desde la perspectivas de las organizaciones empresariales” ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos...*, op.cit., p. 163.

⁴¹⁸ CEOE y CEPYME, “Declaración de CEOE y CEPYME ante los incumplimientos del AES y la situación en que se encuentra el acuerdo”, Madrid, 30 de julio; “Carta de Joaquín Almunia –Ministro de Trabajo y Seguridad Social– a José María Cuevas –Presidente de la CEOE–. Madrid, 31 de julio de 1985”. Todos los documentos han sido localizados en, AHHFLC, sig. AI-613-01, dentro del Fondo de la Secretaria de Acción Institucional. Asimismo se ha de apuntar la dureza con la que el Ministro de Trabajo concluiría aquella misiva, como ejemplo, de la trascendencia histórica que adquiriría dicha decisión. «Por

manipular los hechos por parte de la patronal tras lo acordado sabiendo que no existía –por lo que conocemos– un compromiso explícito? Ahora bien, quizás la pregunta a formularse, todavía hoy no sea esa: pese lo filtrado por Rodolfo Serrano y Mariano Guindal, ¿a qué tipo de acuerdos llegaría el Presidente del Gobierno con el propio José María Cuevas en esos frenéticos días de conspiraciones, elaboración de borradores y fabricación de comunicados ambiguos como difusos? La última palabra, como en otros tantos casos, la tiene quien fuera Presidente del Gobierno.

En realidad, es que hasta muchos años después no se sabría en que habría consistido el “engaño” y/o la “traición”, o mejor dicho la *jugada maestra* que se sacaría de la *manga* Nicolás Redondo, en otro ejemplo más de la metáfora de las *salchichas* y las *leyes*. Gracias a la tesis doctoral de Emma Cerviño, en base a una entrevista con Almunia, el *misterio* quedaría resuelto de la siguiente forma:

«UGT, sin embargo, no estaba tan segura de que el gobierno no fuera a cambiar la legislación del despido en la dirección propuesta por la CEOE. Por este motivo, una vez firmado el acuerdo, el Secretario General, Nicolás Redondo, pidió al Ministro de Trabajo que redactase una carta en la que se comprometiera a no desarrollar ninguna medida que pudiera facilitar los despidos colectivos. Esta petición fue cumplida por el ministro quien envió dicha carta al Secretario General de UGT y no realizó cambio alguno sobre la legislación de despido»⁴¹⁹.

Más o menos elaborado el nuevo argumento institucional desde Trabajo con el que se salvaba no pocos escollos y potenciales conflictos empezando con el de la UGT; días antes la propia central socialista se elaboraría un largo informe interno acerca de los resultados de las 18 Comisiones o cuestiones tratadas en torno al AES. Allí se mostraría casi segura –aunque, en verdad, las *dudas* se mantendrían hasta el último momento– de la muy previsible respuesta del Gobierno, tras no pocos disgustos como tras no pocas sorpresas presentes y futuras. Mucho era lo que se jugaba.

«El pasado 10 de abril se cumplió el plazo fijado en el Artículo 17 del AES [...].

Se celebró una reunión con la CEOE en la que comprobamos la imposibilidad de formular propuestas comunes en este tema; por ello, dentro del plazo previsto en el AES envíanos al Gobierno nuestras propuestas, que fueron remitidas por circular a toda la Organización [...].

esto, quedan respondidas así las cuestiones planteadas. Si son o no satisfactorias las respuestas, es cuestión que debe ser tratada con las mismas reglas del juego que los firmantes del AES nos dimos en octubre de 1984, es decir, en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo. Desbordar ese marco significaría situar el Acuerdo en esa ‘vía muerta’ a la que alude el Documento, y no va a ser el Gobierno quien actúe en esa dirección. Ahora bien, con la misma firmeza con la que el Gobierno manifiesta su voluntad de continuar los esfuerzos para asegurar el futuro del AES, también debe afirmar que el AES no puede convertirse en un pretexto para exigir del Gobierno la adopción en común de política y decisiones que sólo a éste competen». Tiempo después el propio Almunia en sus *memorias políticas*, explicaría la posición adoptada desde un principio por Trabajo, y a través de la cual se puede presuponer que la intención gubernamental siempre fue no aceptar las tesis patronales: «Todos sabíamos que en cuanto nos integrásemos en la Comunidad, la directiva tendría que ser trasladada a nuestra legislación interna, como todas las demás. Pero la interpretación que hacíamos de ella en el ministerio, su texto no obligaba a suprimir la autorización administrativa que estaba regulada en el Estatuto; la razón que alegábamos era que se trataba de una directiva que fijaba unos niveles mínimos de protección de los trabajadores, por lo que no tenía sentido la lectura que hacía de ella la patronal». ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas...*, *op.cit.*, p. 174. Al respecto véase, MULAS GARCÍA, Alejandro, “Sobre la directiva CEE de 17/2/1975, relativa a los despidos colectivos: Notas a una cuestión polémica”, *Documentación Laboral*, nº 13, (1984), pp. 47-76.

⁴¹⁹ CERVIÑO, Emma, *Políticas de representación...*, *op.cit.*, p. 185. Y a continuación se recogían las siguientes declaraciones de Almunia: «Poco después de firmar el AES, da lugar a un intercambio de cartas que hago con Nicolás Redondo, diciéndole: te certifico, te hago llegar mi convicción, de que la redacción sobre despidos colectivos no implica la supresión de la autorización administrativa». Asimismo y como reconocería quien fuera Ministro de Trabajo: «La CEOE quiere eliminar la autorización previa. La UGT no. Y yo busco con la gente del gobierno y del ministerio una redacción de esas que vale para un roto y para un descosido». *Ibídem*, pp. 185 *nota 40* y 184 *nota 39*.

Nuestra posición en este punto es diáfana y perfectamente conocida por todos no es admisible introducir en nuestro ordenamiento una modificación facilitadora del despido ya que ésta sólo puede generar más paro.

Para la Unión General de Trabajadores, en ningún caso, procede facilitar los despidos en un país que sufre más que ninguno la lacra del paro, que ya tiene una facilidad para el despido equiparable plenamente a Europa y cuyas prestaciones sociales distan todavía mucho de las que existen en la CEE

Por ello esperamos que próximamente el Gobierno, que ya ha recibido las propuestas nuestras y de la CEOE, exprese formalmente su posición definitiva sobre este aspecto»⁴²⁰.

Tras conocerse la carta de Almunia a Cuevas –filtrada rápidamente a la Secretaria de Acción Institucional de UGT dirigida por Zufiaur– se cerraría uno de los capítulos más complicados –e insistimos, menos aclarados– de la historia de la concertación social en España. Fuera o no a costa de *traicionar* –o puestos al caso, directamente engañar a la patronal– se salvaría la *unidad* de la familia socialista.

12.3.4. ¿Divisiones en la familia socialista? De entrada, NO. Los *costes tangibles* y *no tangibles* del AES

«No se sabía si Corcuera negociaba en nombre de la UGT o en nombre del Gobierno. Había una situación muy tensa».

José María ZUFIAUR, Secretaria de Acción Institucional de la UGT, (1983-1986)⁴²¹.

«Sin embargo, el papel de Corcuera en ese tema y en tantos otros, fue básico para llegar a entendimientos con la UGT. Todo ello, frente a la actitud de Nicolás Redondo. Pero este grado de entendimiento pudo darse porque Corcuera [...] sabía que el que tenía razón era yo. Sin embargo, él tenía una representación, tenía que defender sus intereses, y los defendía a cara de perro, y me parecía bien, era su nivel. Su posición de lealtad al Gobierno desde el sindicato le costó que Nicolás Redondo le considerara un traidor. Pero Corcuera fue leal al Gobierno, porque él ‘era de verdad’. Ésa es la explicación. Otras explicaciones complementarias, sobre Nicolás Redondo, son más dolorosas y no voy a darlas. Yo creo que él tenía contradicciones personales no superadas. A mi juicio, no hay ninguna explicación política válida. ¿Pretendió Nicolás Redondo que la política económica del Gobierno recibiera su bendición? Probablemente, sí. Pero yo creo que eso no era lo que determinaba su comportamiento, ni que tuviera un concepto mesiánico de sí mismo. Visto con perspectiva... Era eso... tenía contradicciones personales no superadas. Esto lo repito, pero no quiero ir más allá, que podría hacerlo».

Felipe GONZÁLEZ, Presidente del Gobierno (1982-1996)⁴²².

Diez años habían pasado exactamente del llamado Congreso de Suresnes, cuando Nicolás Redondo, junto con Felipe González, decidieran repartirse las secretarías generales de

⁴²⁰ AHFFLC, UGT, Secretaria de Acción Institucional, “Informe. Comisión de Seguimiento del AES. Julio 1985”, sig. AI-613-01. Como por su parte explicaría Oliet Palá, cuando la UGT «presento sus propuestas al Gobierno [en la citada reunión de abril de 1985] intentó demostrar que el AES, su artículo 17, se cumplía sin modificar nada. La adaptación al acervo comunitario y a la directiva significaba mantener la legislación española, más favorable». OLJET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, *op.cit.*, pp. 195-196.

⁴²¹ Declaraciones de José María Zufiaur a, CERVÍÑO, *Políticas de representación...*, *op.cit.*, p. 187.

⁴²² Felipe González en IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada...*, *op.cit.*, pp. 826-827.

UGT y el PSOE, respectivamente, y sin aparentes problemas por tal división de trabajo. Desde aquella fecha ambos protagonistas de la reciente historia política de la nación, habían pasado por todas las situaciones y vivencias imaginables y no imaginables. La amistad, la consideración y el respeto se seguían manteniendo, aunque después de dos años de Gobierno la confianza mutua entre ambos se había deteriorado, pero sobre todo aparecían grietas considerables entre el Partido y Sindicato hermanos en torno al mismo proyecto político compartido.

Hasta la traumática ruptura histórica del socialismo español todavía debería pasar más de tres años⁴²³. Si algo había venido a demostrar, en todo caso, lo acontecido desde diciembre de 1982 hasta los últimos meses de 1984, era que la familia socialista se encontraba anclada bajo fuertes raíces de confianza personalista, a pesar de los inquietantes signos de distanciamiento. Tan sólo hace falta revisar lo mucho que la UGT había tenido que poner de su parte en la reforma del mercado de trabajo de 1983, en el *non nato* AI'84 o directamente en el AES, entre otras muchas cuestiones que se habían ido entrelazando en el camino –la *traición* de las 40 horas en junio de 1983, la reconversión industrial, los pactos con la CEOE a espaldas de UGT, las “salidas de tono” del Equipo Económico de Boyer y Solchaga y, claro está, del antiguo asesor ugetista, el señor Almunia–. De tal forma, que la compatibilidad entre ambos proyectos dentro del socialismo español –el político y sindical– empezaría a resentirse ante la evidencia de lo que les empezaba a separar no era poco. Como demostraría el paso del tiempo la definición del concepto de la solidaridad no era atemporal ni era ilimitado.

Las pruebas de resistencia, de tenacidad, en las virtudes del camino emprendido aquel mitificado 28 de octubre de 1982, progresivamente, dejarían a una UGT cada más exhausta, pero sobre todo con cada vez menos crédito entre los trabajadores. La sensación colectiva –a modo de *imagen-fuerza*– que se iría imponiendo durante la primera legislatura socialista era claro: mientras que la UGT mucho ponía de su parte, el Gobierno mantenía su obsesión con las cifras macroeconómicas dejando caer alguna contraprestación *sindical* o llegando el caso *social*. Como advertiría el propio Rubén Vega:

«Al término de la legislatura, las diferencias han tenido el efecto de romper la armonía inicial, pero no la solidaridad que insufla la pertenencia a la ‘familia socialista’. El apoyo recíproco de cara a las elecciones generales y sindicales que tienen lugar en 1986 certifica la persistencia de estos vínculos, a pesar de las pruebas a que han sido sometidos a lo largo de los últimos años»⁴²⁴.

Justamente en aquellos dos años a la par que se ensancharían los límites de la confianza y de la paciencia por parte de la UGT, al mismo tiempo, se debilitarían ambos elementos básicos de las buenas relaciones entre Partido-Sindicato-Gobierno. Una relación familiar que se mantendría cada vez más débil hasta la posterior ruptura entre 1987 y 1988.

Para el Gobierno y el PSOE el *coste del AES*, en términos de imagen y de perspectivas electorales, resultaría bastante menor en comparación con el desgaste ocasionado con los procesos de reconversión industrial y el referéndum de la OTAN. Especialmente porque el AES nunca llegaría alcanzar la significancia simbólica –ni mucho menos histórica– de unos *Pactos de la Moncloa* o del propio ANE. Ello, en gran medida, a que el acuerdo se firmaría cuando se había *normalizado* socialmente la crisis económica y también porque de por medio no había existido ningún Golpe de Estado. En este parcial desgaste, asimismo, contribuiría el escaso entusiasmo con que el firmaría el acuerdo social, tal y como ya se ha dejado asentado⁴²⁵.

⁴²³ Véase lo apuntado en la *nota 142*.

⁴²⁴ VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, *op.cit.*, p. 148.

⁴²⁵ Resulta aquí de enorme interés acercarse a los resultados expuestos en su día en, EQUIPO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, *Los trabajadores ante la concertación social*, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1986.

Lo anterior no sería obstáculo, de modo alguno, para que con una tremenda rapidez desde la Ejecutiva socialista se pretendiera auto-atribuirse la paternidad del acuerdo-social, además de promocionar todas sus indudables ventajas, empezando por las de la contratación de los jóvenes mediante las nuevas formas legislativas. Junto a las *circulares* enviadas desde la Ejecutiva en donde se procedería a detallar, punto por punto, las características de las nuevas formas contractuales⁴²⁶, hasta las páginas de *El Socialista* se puede observar este proceso. Especialmente, relevante sería la actitud de este último medio –y por las mismas fechas por *Unión*⁴²⁷–. Así por ejemplo, en la portada de *El Socialista* en su número 370 –correspondiente a los días 15 al 30 de noviembre– se abriría la misma en un lugar secundario con el siguiente titular: “Ventajas para contratar a jóvenes”. En un tono claramente pro-empresarial se subtitularía: “Las empresas tendrán hasta un 10 por 100 de reducción a la Cotización de la Seguridad Social”. A sumarse a otras claras como favorables ventajas al respecto⁴²⁸.

Pasadas las celebraciones oportunas, la cruda realidad volvería a reaparecer. Una cosa era que no hubiera deterioro electoral y otra muy diferente que tras cerca de dos años en el poder, el desgaste político hubiera comenzado a hacer mella. Superado el trámite político –pues no mayor consideración e importancia se le otorgaría desde el Gobierno al mismo, como denunciara incluso un editorial de *El País*⁴²⁹– del Debate de la Nación –del 23 al 25 de octubre de 1984– el 28 de octubre *El País* publicaba aun amplio sondeo a dos años del triunfo electoral socialista⁴³⁰.

Más allá de todas y cada una de las campañas de “exaltación del PSOE” en cada aniversario de su triunfo electoral⁴³¹, los resultados no podían de ser más relevadores: el PSOE perdía una considerable intención de voto –36% lejos del 56% de octubre de 1982– pero los mismos no iban ni a Alianza Popular que retrocedía considerablemente –14,9% frente al 25,3% dos años antes– sino a la abstención –alrededor del 30%–. Con todo, el “partido socialista

⁴²⁶ AHFFLC, PSOE, Secretaría Sindical, “Circular. A las agrupaciones provinciales, comarcales e insulares. Madrid, 26 de noviembre de 1984”, sig. AI-612-01.

⁴²⁷ Antes que se conociera la redacción definitiva del RD 2104/1984, y cuando todavía se mantenía la más estricta confianza en las intenciones de Trabajo, en un número de *Unión* –en concreto, el nº 60, (1984)– correspondiente a la primera quincena de noviembre, no sólo se publicaría un amplio informe del Gabinete Jurídico –“Modalidades de contratación” (pp. 4-5)– favorables a las tesis laborales contenidas en el AES, sino que también se incluiría un artículo de opinión al final del citado ejemplar en esa misma línea. En este último texto, se advertía que no se podía desconfiar, de entrada, de la contratación temporal por sí misma. NOGALES, Rafael, “La contratación temporal. Puede beneficiar a los jóvenes” (p. 20). A partir de aquel número se volvería a retomar la *política* del silencio y/o omisión con respecto a la siempre ‘delicada’ cuestión del contrato de trabajo. Un *silencio* que coincidiría con la publicación del RD 2104/1984.

⁴²⁸ PORTADA, “Ventajas para contratar a jóvenes”, *El Socialista*, nº 370, (1984), p. 1. Más aún, por en las páginas interiores se detallarían, con todo lujo de detalles, tan magníficas oportunidades: “Los jóvenes no pagarán cuota a la Seguridad Social” (p.7). Ya en el anterior número, se dejaría constatado lo siguiente: “El Gobierno abre nuevas vías para la contratación temporal”, *El Socialista*, nº 369, (1984), p. 6.

⁴²⁹ Editorial, “Dos años después”, *El País*, 28 de octubre de 1984.

⁴³⁰ Realizado por el desaparecido Servicios de Estudios de *El País* en base a 2.000 entrevistas y con un límite máximo de error del 2,2%. Fecha de realización de las entrevistas entre el 21 y 23 de octubre de 1984. Ver, Noticia, “Ficha técnica del sondeo”, *El País*, 28 de octubre de 1984.

⁴³¹ Por ejemplo, desde *ABC* no se dudaría en denunciar la instrumentalización del Gobierno socialista de TVE para sus propios fines con ocasión del citado aniversario: «Esa es la causa que explica que el Poder lance de nuevo todo el enorme y oneroso aparato de la propaganda con la intención –explicable, pero inaceptable– de maquillar el saldo negativo que el último debate parlamentario arroja para el presidente del Gobierno. Se recurre a una serie de informaciones interesadas desde la radio y la TVE, y a procedimientos poco originales, como la improvisación de encuestas del estilo de la publicada por el diario gubernamental». Editorial, “El deterioro político de Felipe González”, *ABC*, 28 de octubre de 1984.

probablemente perdería la mayoría absoluta de las Cortes si se celebran elecciones en fecha próxima, ya que ha caído en 10 puntos desde 1982»⁴³².

Un año antes en un sondeo realizado por SOFEMASA para *El País* –bastante más amplio⁴³³– reflejaba un desgaste toda mayor: tan “sólo” el 34% votaría al PSOE –es decir, dos puntos por debajo de los datos de 1984–⁴³⁴. No obstante, mucho más llamativo resultaban los datos relativos a AP, pues con un porcentaje del voto del 17% estaban tres puntos encima de 1984. La oposición derechista encabeza por Manuel Fraga no sólo no era capaz de *desgastar* al Gobierno socialista electoralmente, sino que perdía fuelle como segunda opción electoral⁴³⁵.

También se confirmaba que a la izquierda del PSOE, básicamente, representada por el Partido Comunista de España, la “travesía por el desierto” no había hecho más que comenzar: así el PCE pasaba del 3,8% cosechado en las elecciones de 1982 a una intención del 4,6%. Ni

⁴³² Noticia, “El PSOE mantiene el 72% de sus votantes después de un año de gobierno”, *El País*, 27 de noviembre de 1984.

⁴³³ Realizado por SOMEFASA en base a 3.000 entrevistas y con un límite máximo de error del 1,8%. Fecha de realización de las entrevistas entre el 16 y 22 de noviembre. Noticia, “Ficha técnica del sondeo”, *El País*, 27 de noviembre de 1984.

⁴³⁴ «Un año después de la arrollada victoria electoral de Felipe González, ni el desgaste del poder, ni los errores, fallos y omisiones, asociaciones con la acción de gobernar, parecen haber modificado significativamente las actitudes de la sociedad española respecto al proyecto político que, bautizado con el nombre de *cambio*, los socialistas ofrecieron». De esta forma comenzaba el editorial de *El País* dedicado al primer aniversario de la victoria socialista. Una fecha en donde también se constataba la falta de alternativa al Gobierno socialista: «[P]ero nada hay en el horizonte que parezca poner en riesgo por el momento la hegemonía del equipo dirigido por Felipe González». Se avanzaba, igualmente, allí, a la altura –recuérdese– de octubre de 1983, la convicción de que la «lucha contra el paro y la contención de la inflación son objetivos cuya instrumentación concreta dará lugar a conflictos sociales». Ya entonces desde *El País* se criticaría la forma de entender e interpretar el poder de forma elitista. No obstante, llegados a ese punto no quedaba más remedio –según la citada *nota de opinión*– que continuar con el proyecto modernizador iniciado: «La lógica del reformismo, peculiar del socialismo democrático, obliga a la mayoría parlamentaria de Felipe González a realizar tareas que, fuera de la política, serían consideradas como locos intentos de conseguir la cuadratura del círculo». Una *lógica reformista* basada también en «la gran cantidad de apoyo social y de apoyo ciudadano que el PSOE continúa teniendo un año después del 28 de octubre». Editorial, “Primer aniversario”, *El País*, 28 de octubre de 1984. En aquel primer aniversario de las elecciones del 28 de octubre de 1982, *ABC* lo celebraría a su manera. Con una portada que llevaba el siguiente título: «El 28 de octubre se hizo realidad la monarquía de todos», bajo una fotografía de Juan Carlos I y Felipe González estrechándose las manos. A su manera también interpretaría aquel acontecimiento: «El 28 de octubre, hace hoy un año, llegaba al Poder el Partido Socialista después de unas elecciones libres». Borradas de la historia la II República, tocaba la oportuna exaltación de la monarquía cuyo teórico y supuesto compromiso con la democracia se hacía retroceder –ni más ni menos– que a 1941: «El ascenso de la izquierda al Gobierno, dentro de la normalidad constitucional, venía a demostrar la sinceridad del compromiso histórico que adquirió en 1941 la Corona a través del que entonces era jefe de la Casa Real Española en el exilio, Don Juan de Borbón». El editorial del día también continuaba en aquella misma línea, aunque con el *recado* correspondiente: «Ahora es necesario, para la consolidación de la democracia, que prospere la actitud de los socialistas moderados. Si, por el contrario, se impusieran los radicales, como está ocurriendo en algunos sectores, sobre todo de la información [...] entonces el esfuerzo de la Monárquica [*sic*] había resultado baldío y la democracia pluralista quedaría arrumbada en los desvanes de la Historia». Portada, “El 28 de octubre se hizo realidad la monarquía de todos”, *ABC*, 28 de octubre de 1983; Editorial, “Compromiso democrático”, *ABC*, 28 de octubre de 1983.

⁴³⁵ Esta era la tesis principal del editorial de *El País*, quien tras destacar la situación de *desaliento* y *pesimismo*, afirmaba: «Si los españoles consideran que las cosas van peor que antes o no mejoran sustancialmente y, a la vez, mantienen su apoyo mayoritario al Gobierno socialista y a Felipe González, la causa decisiva de esa doble actitud aparentemente contradictoria es la ausencia de una alternativa razonable. Manteniéndose las cosas igual, el PSOE no tendría, en una futura confrontación electoral, enemigos que pudieran preocuparle, ni a su derecha ni a su izquierda». Editorial, “Dos años después”, *El País*, 28 de octubre de 1984.

un punto de mejora, tras dos años denunciando la política liberal del PSOE⁴³⁶. El socialismo no era inmune electoralmente, pero, en cualquier caso, no debería de preocuparle demasiado la siempre denunciada oposición comunista en términos electorales.

Por lo demás, la fidelidad del votante socialista –tal y como se comprobaría durante las tres citas electorales siguientes– cobraría un peso indudable en todos y cada uno de los pronósticos al respecto⁴³⁷. Asimismo frente al 45% de los ciudadanos que consideraban que la situación general estaba igual, el 33% consideraban que habían empeorado, y un 22% pensaba que estaban las cosas igual o mejor⁴³⁸. El efecto de la conflictividad, aparentemente, parecía que no había pasado factura al Ejecutivo. De esta forma, en 1983 un 30% estimaba que las cosas habían mejorado con el Gobierno del PSOE.

Todos los datos anteriores quedaban matizados muy considerablemente ante la buena imagen del Presidente del Gobierno. González, en buena medida, se convertiría en el “antídoto” contra un posible desgaste del Ejecutivo en su transitar modernizador. “Efectivamente [...] las cosas han empeorado para muchos encuestados, pero casi la mitad piensan que el Gobierno está teniendo éxito en su gestión [...]. La creencia en el éxito del Ejecutivo es especialmente alta para el caso del Presidente González, cuya imagen es mejor que la del Gobierno en conjunto”. Más allá de otras cuestiones colindantes como los factores de clase, el “antídoto González” quedaba, asimismo, evidenciado al obtener una valoración positiva del 60% por tan sólo un 26,6% en términos negativos⁴³⁹.

El citado sondeo, por lo demás, revelaría como Joaquín Almunia era el peor valorado con un 40% contrario a su gestión. Ello con un dato a tener presente: “Curiosamente –se podía leer en el comentario de *El País* al respecto– las clases más desfavorecidas económicamente se muestran en su calificación menos duras, con un 61% de repuestas que reprueban su gestión”. El *queme* del titular de Ministerio de Trabajo no por esperado, en cualquier caso sorprendía, ya que se encontraba un puesto más arriba que Solchaga –31% de valoración negativa– y dos por encima de Miguel Boyer. “Este último mantiene, sin embargo, porcentajes muy similares entre detractores (38%) y respuestas favorables (36%)”. A lo que se añadía un comentario digno de pasar a los anales: “A Boyer, que, a juzgar por el desglose de porcentajes, no parece despertar excesivo rencor entre los españoles, le apoyan, sin embargo, los interrogados de alto nivel cultural y los ejecutivos”⁴⁴⁰.

⁴³⁶ Noticia, “El PSOE mantiene el 72% de sus votantes después de un año de gobierno”, *El País*, 27 de noviembre de 1984.

⁴³⁷ Nos remitimos aquí a lo apuntado en el apartado “2.2.8. Ciencias políticas: una bibliografía central para el estudio del socialismo y de la socialdemocracia europea a nivel comparado”.

⁴³⁸ Noticia, “El desgaste socialista no beneficia a la oposición”, *El País*, 28 de octubre de 1984.

⁴³⁹ Noticia, “Felipe González tiene mejor imagen que el conjunto del Gobierno”, *El País*, 28 de octubre de 1984. Datos y sondeos que para el *ABC* tenían una lectura radicalmente diferente: «En términos de desgaste parece que hubiéramos llegado ya al final de la legislatura. El proceso se hace más visible en la medida de que la erosión se centra primordialmente en el activo principal del socialismo español: la imagen del presidente del Gobierno». No se llegaba a descartar desde esas mismas líneas un posible adelanto electoral, en lo que no dejaba de ser una interpretación claramente sesgada, más aún cuando se había apoyado desde el mismo periódico la firma del AES que iba a garantizar la *paz laboral* antes que la *paz social* al propio Ejecutivo. Una interpretación, la del *ABC*, todavía más inverosímil de sostener cuando la intención de voto de la derecha no dejaba más que desplomarse: «En este sentido es de temer que, ante el deterioro político de Felipe González, el poder se obsesione en un adelantamiento de las elecciones para que las urnas encuentren al socialismo lo menos descapitalizado posible. La proximidad de la convocatoria electoral acentuaría el proceso de falsificación de las alternativas al socialismo. Hoy es la fecha adecuada para considerarlo» Editorial, “El deterioro político de Felipe González”, *ABC*, 28 de octubre de 1984.

⁴⁴⁰ Noticia, “Joaquín Almunia, el peor”, *El País*, 28 de octubre de 1984. Véanse los otros resultados en: Noticia, “Ministros «aprobados», «suspensos» e ignorados”, *El País*, 28 de octubre de 1984; Noticia, “Morán el primero de los «aprobados»”, *El País*, 28 de octubre de 1984.

Las valoraciones ya más concretas sobre la economía y el paro –los dos principales objetos de esta investigación– tampoco depararían mayores sorpresas. “Una abrumadora mayoría de los españoles piensa que bajo el Gobierno socialista ha empeorado la situación económica, y especialmente el paro”. Las cifras no eran menores: un 69% señalaría que el desempleo había empeorado. Dato que en menos de un año se había incrementado en diecisiete puntos. Ni siquiera el *mensaje* de que se había tocado fondo parecía haber calado: tan sólo un 13% de los ciudadanos se mostraban optimistas y veían el citado problema en vías de solución en 1984. A esto se sumaría como cerca de un 47% –8 puntos más que en 1983 (39%)– mostrarían su pesimismo rotundo con respecto a la marcha de la economía, a lo que se añadiría un 50% –diez puntos más que en 1983 (40%)– en relación a la inseguridad ciudadana⁴⁴¹. Los *efectos* del fatídico ochenta y cuatro parecían tener su *justo* reflejo en aquellas mismas variables antes que en la propia valoración del Ejecutivo y su política económica, lo que, en todo caso, no dejaba ser algo un tanto contradictorio. Igualmente se conocería como un 52% de los españoles estaban en contra de la permanencia en la OTAN, cifra que alcanzaba veinte puntos más en el País Vasco⁴⁴². Datos, en este caso, bastante similares a los de un año antes cuando un 51% se había mostrado contrario a la integración plena en la estructura militar de la OTAN⁴⁴³.

Ahora bien, los dos primeros años de Gobierno socialista –en concreto desde la investidura de González como Presidente del Gobierno– tenían una importancia que iban mucho más allá de estadísticas, de sondeos o datos de intención de voto. A saber, guardaban una trascendencia histórica de primer orden. Una trascendencia que supo captar perfectamente un editorial de *El País*. Allí se puntualizaban tres *ideas-fuerza* que lejos de los elaborados discursos propagandísticos del aparato socialista en torno al supuesto *cambio*, venían a poner el acento en lo realmente interesante de aquellos primeros dos años de Gobierno. “En una perspectiva histórica, ese acontecimiento inicial y el normal desenvolvimiento del Gobierno González a lo largo de su primer bienio serán los datos principales que retendrán futuras generaciones”, empezaba señalando el citado editorial titulado “El primer bienio socialista”. Aunque se pudiera discutir el concepto de “normal” tras todo lo que sucedería en términos de conflictividad durante el primer trimestre de 1984, el equipo socialista garantizaría una estabilidad y una capacidad de control de la situación, que, en cualquier otra situación, hubiera tumbado a un Ejecutivo tuviera o no tuviera el respaldo de más de doscientos diputados en la Cámara Alta. En segundo término se remarcaba: “La ausencia de una alternativa razonable y la conciencia de la inexistencia de recetas mágicas para las dolencias de nuestra economía pueden explicar la paradoja de que el *aprobado* concedido al Gobierno coexista con una visión más bien negativa de los resultados concretos de sus esfuerzos”. A pesar de que aquí también se pudiera discutir largamente sobre la idea de la “única política posible”, lo cierto es que frente al PSOE no había una alternativa política viable ni posible en aquellas circunstancias. Por último, y tras apuntar algo tan obvio como que “el *cambio* no es no todavía algo tangible para los españoles”, se indicaba la *idea-fuerza* de la capacidad de gobernar, y de la *buena imagen* del

⁴⁴¹ Noticia, “Pesimismo ante la economía, el paro y la seguridad ciudadana, y optimismo sobre las libertades”, *El País*, 28 de octubre de 1984. Noticia, “Balance negativo en paro, precios y terrorismo y positivo en libertades, lucha contra la corrupción e involucionismo”, *El País*, 27 de noviembre de 1983.

⁴⁴² Noticia, “El 52% de los españoles está contra la OTAN, y más de dos tercios rechazan las bases norteamericanas en España”, *El País*, 28 de octubre de 1984. Un año antes, según un amplio estudio del CIS –CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, *La opinión pública española ante la OTAN, 1975-1983*– los datos resultaban similares aunque la posición contraria frente al posible referéndum contaba con un apoyo ligeramente superior: 17% a favor, 56% en contra, un 28% entre no sabe y no contesta. Aquel estudio relevaba otra cuestión: un 71% de los que se oponían a la permanencia en la OTAN lo seguirían estando en caso de que España entrara en la CEE. Por partidos tan sólo 10% de los que decían votar al PSOE se mostraban a favor de la incorporación. Noticia, Juan Roldán, “El 56% de los españoles se muestra contrario a la plena integración en la OTAN, según datos del Gobierno”, *El País*, 28 de octubre 1983.

⁴⁴³ Noticia, “Los españoles son contrarios a la OTAN y partidarios de la televisión privada y de hacer ciertos sacrificios económicos”, *El País*, 27 de noviembre de 1983.

Gobierno en su conjunto, por más que no se dejara de criticar su prepotencia y su *forma* de interpretar el poder:

«Entre los nuevos equipos de cargos políticos es fácil encontrar honradez, dedicación y talento, pero el tránsito desde la sociedad hasta el aparato del Estado ha producido en algunos sectores del partido socialista –no tan minoritarios– una infatuación ridícula, resistente a la crítica, y una preocupante tendencia a descalificar a los discrepantes. Aunque la corrupción personal parece inexistente o mínima entre los cargos políticos, y aunque las denuncias de corrupción institucional (en beneficio del PSOE) no hayan sido probadas, el desparramo de algunos administradores del dinero público para organizar el derroche sigue siendo notable»⁴⁴⁴.

Muy diferentes serían los *costes del AES* para la UGT. En realidad, aquí es difícil de entender las tesis de Rubén Vega, cuando hablaría de cómo la firma del citado acuerdo reconduciría la situación entre Sindicato y Partido/gobierno a una “mayor armonía entre la UGT y el Gobierno”⁴⁴⁵. Como reconocería Almunia la “negociación de AES había vuelto a poner de manifiesto que Nicolás Redondo se sentía más alejado de las orientaciones de la política del Gobierno”⁴⁴⁶.

De esta forma, y a buen seguro, el *agente social* que más perjudicado saldría política y organizativamente del largo proceso negociador sería la central socialista. Lo acontecido el 6 de octubre en el Comité Confederal –tal y como explicamos en su momento– iría mucho más allá de las clásicas críticas del Sector de Banca, de la Federación de la Construcción o alguna otra *díscola* federación, una vez, recuérdese, que se había purgado democráticamente a la Unión de Álava.

Buena parte de la dirección confederal así como de la militancia cualificada de UGT, habían asistido impotentes a los hechos consumados del trance negociador. Verían, igualmente, como todas y cada una de las *tesis* de su último Congreso Confederal, al respecto de la negociación colectiva y los acuerdos sociales se había venido abajo. Peor incluso era el secretismo y el oscurantismo de cómo se había llevado a cabo la negociación. A pesar de su constatada proclividad a cesiones considerables para llegar a acuerdos, con el AES se alcanzarían cuotas insospechadas alcanzando la *fe ugetista* su más alto nivel durante toda la “década del cambio”. A lo que había que sumarse la ya extendida e inclusive consolidada sensación de la falta de autonomía de la organización sindical socialista, subsumida a los dictados del Gobierno. De este modo, si la prueba de la reforma del mercado de trabajo se había pasado sin mayores contratiempos, el AES dejaría una larga y profunda huella.

Por más que se mostrara altiva frente a las Comisiones Obreras en su auto-otorgado de papel de árbitro en las comisiones del AES, o se defendiera con cada vez mayor convicción –mayoritariamente tan sólo en público– el citado acuerdo social; su situación de debilidad y de aislamiento eran ya palpables. Una pésima situación para afrontar con mínimas garantías todas

⁴⁴⁴ Editorial, “El primer bienio socialista”, *El País*, 2 de diciembre de 1984.

⁴⁴⁵ VEGA, Rubén, *La reconstrucción de..., op.cit.*, p. 156. Más realista se mostraría Alfonso Guerra: «El acuerdo logrado era importante para el Gobierno, pero no podríamos hacernos la ilusión de que las relaciones con UGT y sobre todo con su secretario general, Nicolás Redondo, estaban restauradas por haber firmado el AES». GUERRA, Alfonso, *Dejando atrás los..., op.cit.*

⁴⁴⁶ Una explicación que complementaría de la siguiente forma, con *recado* al final incluido: «Nicolás Redondo no compartía prácticamente ninguna de las bases de la política económica que estábamos llevando a cabo, por lo que se negaba a que UGT tuviese que corresponsabilizarse de los esfuerzos del Gobierno para recuperar un ritmo razonable de crecimiento. Quería utilizar el poder del sindicato para deslegitimar la acción del Gobierno, o para ganarle un pulso obligándole a cambiar el rumbo. Si Felipe y el PSOE no le hacían caso, estaba dispuesto a plantar cara con todas sus consecuencias. Desde su punto de vista, la firma del AES había sido la última oportunidad que nos daba la UGT. En el desarrollo del acuerdo, se disponía a aplicar con rigor esas nuevas reglas de juego. ¡Qué lejos estaban estas posiciones de las que él mismo había mantenido cuatro años antes!, pidiéndole al partido que ‘domesticase’ a quienes dentro del sindicato pretendían una mayor autonomía de éste respecto del PSOE». ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas..., op.cit.*, pp. 175 y 176, respectivamente.

las reformas previstas en el propio Acuerdo Económico y Social, sobre todo cuando desde el Ministerio de Trabajo sin convocar la primera reunión de trabajo ni entregar ningún tipo de documentación acerca de la futura reforma de la Seguridad Social, se daba a conocer tal pre-proyecto con una infinidad de detalles que haría las “delicias” de los asistentes a un encuentro empresarial. A finales de noviembre, Luis García de Blas –Secretario General de la Seguridad Social– en el *Euroforum* titulado “Los fondos de pensiones en España”, repetiría, a píe puntillas, la doctrina liberal al respecto. No sólo insistiría en el mito de la quiebra, sino también en la necesidad de regular de los fondos de privado de pensiones, y, claro está, el de combatir el fraude de los contribuyentes. Todo ello en aras de *salvar* el sistema en su conjunto⁴⁴⁷.

En este inquietante panorama, estallaría la primera gran crisis interna de la UGT durante la década de los ochenta. El *factor Corcuera* se constituiría en el elemento explicativo central como hemos remarcado en numerosas ocasiones. Por lo demás, y aunque ya se ha hecho mención, ha de tenerse muy presente que la relación entre Redondo y Corcuera transcendía lo político para situarse en un plano personal⁴⁴⁸. Considerado durante mucho tiempo por el propio Secretario General como un posible sucesor, la forma de llevar a cabo la negociación del AES por Corcuera comenzaría a finiquitar tal posibilidad. El nombre de José Luis Corcuera que había sonado como posible Ministro de Trabajo en el primer Gobierno, no dejaría de estar en ninguna de las quinielas, incluida la elaboradora durante el verano del ochenta y cuatro. Un elemento que indicaba la muy fluida relación y un alto grado de entendimiento entre Corcuera y el Gobierno y dentro de ahí con el propio González, Almunia e inclusive con Boyer.

En vísperas de la celebración del XXX Congreso del PSOE, las tensiones acumuladas en el seno de la UGT saltarían inclusive a las páginas de *El País*. La rígida y casi estalinista – o “búlgara” si se prefiere– disciplina de la central socialista, traducida en un silencio informativo sobre los problemas internos, no aguantaría en aquella ocasión. La paciencia de Redondo había llegado a su límite frente a la actitud de Corcuera considerado el *número dos* de la organización.

Se filtraría, de nuevo, de la mano de Rodolfo Serrano –quien volvería a firmar parte de sus noticias con sólo sus iniciales– como las tensiones dentro de UGT había pasado al enfrentamiento. Lo significativo del caso –de ahí la necesidad de preguntarse los porqués se llevaría el asunto a la portada del periódico de *El País* y de *Diario 16* un sábado 1 de diciembre– es que básicamente la información se basaba en lo que había sucedido en las reuniones de la Ejecutiva y del Comité Confederal entre los meses de septiembre y octubre. Según Serrano, en una “reunión de la comisión ejecutiva en la que por primera vez se analizó el AES se produjo un fuerte rechazo al contenido [...]. Corcuera mantuvo que había que firmarlo tal como estaba”. Una posible acuerdo que en aquel entonces se “recogía una propuesta de la CEOE sobre mercado de trabajo” claramente favorable a sus intereses. Por lo que supo a través a la prensa –antes que a través de las sintéticas y medidas actas de la Ejecutiva socialista aquí empleadas– Juan Mazarrasa pero especialmente Zufiaur se enfrentarían directamente a Corcuera. Aunque no se indicará la fecha exacta en tal reporte, se trataría de la reunión de la CEC del 29 de septiembre⁴⁴⁹.

También el periodista de *El País* haría mención a la *resolución* aprobada en el último Comité Confederal celebrado el 6 de octubre que quitaba todo poder ejecutivo a la Comisión

⁴⁴⁷ Noticia, Gustavo Matías, “La reforma de la Seguridad Social será gradual y configurada por media docena de leyes”, *El País*, 28 de noviembre de 1984.

⁴⁴⁸ La situación llegaría hasta tal punto que Rodolfo Serrano afirmaría: «En estos momentos las relaciones entre Corcuera y Redondo son muy tenas. Corcuera [...] ha sentido verdadera adoración por su secretario general. Quien le conoce asegura que se marcharía de la organización antes de aparecer enfrentado a él». Noticia, Rodolfo Serrano, “Nicolás Redondo se enfrenta al PSOE para impedir que el Gobierno instrumentalice el sindicato”, *El País*, 1 de diciembre de 1984.

⁴⁴⁹ AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 45. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 29 de septiembre de 1984”, sig. 002251-003.

Negociadora del AES, en un claro intento de controlar a Corcuera, quien se opondría a la misma. “[Las diferencias] ya se venían arrastrando un cierto malestar por las actuaciones públicas de Corcuera, que, en opinión de algunos sectores, había sobrepasado sus atribuciones”, destacaría el propio Serrano, quien también hablaría de las críticas con respecto al secretismo llevado y el escaso tono sindical del AES. Lo cierto, tal y como mantuvimos, es que aquel Comité Confederal extraordinario daría mucho que hablar durante los siguientes meses, por más que en *El País* se contara una historia muy diferente en octubre de aquel mismo año.

Al menos, ya en diciembre se conocería –en una interesada filtración– que sería Manuel Garnacho el impulsor de la resolución “que no se haría pública”. El asunto no termina ahí, en tanto el acta a la que ya hemos hecho examinado, de forma sospechosa, omitiría todo el segundo turno de replicas, en donde se trataría de esta misma cuestión. “Cuando se produjo la votación, con profunda sorpresa, se observó que la propia Ejecutiva aparecía dividida y que Nicolás Redondo se había abstenido. La resolución se aprobó en medio de un gran escándalo”, indica el propio Serrano. Lo que entonces ya era un secreto a voces, se ponía blanco sobre negro: “Algún ministro ha comentado con cierto humor que, cuando se preparaban las reuniones del AES, Felipe González preguntó qué haría la UGT ante la política del Gobierno y que se le contestó que “«desde luego. Corcuera nos defenderá mejor que nosotros mismos»”. Una anécdota harto significativa de lo que se estaba jugando: “A José Luis Corcuera se le acusa de haber acaparado un exceso de poderes hasta el extremo de que el presidente del Gobierno *punteara* con frecuencia a Nicolás Redonda para tratar temas sindicales”⁴⁵⁰.

En el fondo, dicho enfrentamiento lo que reflejaba eran dos posiciones radicalmente distantes: la del propio Corcuera –apoyado por Antonio Puerta y Matilde Fernández– quien se presentaría, casi sin limitación alguna, como un firme partidario de la política económica del Gobierno; y la de Redondo, junto con Saracíbar, quienes habían depositado buena parte de sus esperanzas de que con el AES se pudieran llegar a modificar los elementos más antisociales de la misma. El resultado, visto lo visto, quedaba del lado de Corcuera por el momento.

Una UGT con problemas internos –aunque lejos de estar dividida– era una *buena* y una *mala* noticia para el PSOE y para el Gobierno al mismo tiempo. Si bien, facilitaban las posibilidades de avanzar más rápido en la lógica reformista liberal, a la par que se reducían los posibles riesgos de enfrentamiento en el proceso congresual del socialismo español; por otro lado, se corría el serio riesgo de debilitar no sólo la familia socialista sino abrir una posible crisis de consecuencias impredecibles. Pero lo que también demostrarían aquellas filtraciones –que ocuparían dos titulares individuales en la portada de *El País* aquel sábado 1 de diciembre– es que el enfrentamiento de Corcuera con Redondo tenía una prolongación clave: “Nicolás Redondo [...] mantiene un enfrentamiento con el aparato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ante el intento del sector más oficialista de esta organización de controlar e instrumentalizar a la central socialista”, sentenciaba Rodolfo Serrano. ¿Era así realmente? No se podía descartar, por más que la UGT hubiera hecho lo indecible para no traicionar sus postulados socialdemócratas, mientras que servía de paracaídas al Gobierno socialista de cara a frenar la conflictividad laboral. La búsqueda de la hegemonía total del socialismo por parte del sector dominante del PSOE quedaba así constatada en un claro desprecio por la autonomía sindical de UGT.

En todo caso, la *jugada* del PSOE –según Serrano– pasaba por dos frentes: por un lado, el “partido pretende utilizar las uniones territoriales –las más fáciles de manejar– para introducir a hombres que apoyen sin condiciones la política del Gobierno”. Y, por otro lado, se decía: “Alfonso Guerra desea que Corcuera ocupe la secretaria sindical en este momento en manos de Manuel Chaves, que quiere dejarla. El problema es que Felipe González quiere mantenerle en su actual puesto hasta que pase a ocupar una cartera ministerial en la próxima remodelación del Gabinete”. Así la UGT aparecía –por más que su política en los procesos

⁴⁵⁰ Portada, “Tensión al máximo nivel en UGT por la política sindical”, *El País*, 1 de diciembre de 1982; Noticia, R.S. [Rodolfo Serrano], “Una larga cadena de discrepancias”, *El País*, 1 de diciembre de 1984.

negociadores nunca hubiera supuesto un obstáculo alguno real a la hora de la verdad y de la firma de los planes gubernamentales del Gobierno— como la *piedra de toque* para eliminar cualquier tipo de disidencia o crítica en el XXX Congreso. Un encuentro congresual en donde la UGT, a través de Redondo principal aunque no únicamente, defendería la salida de la estructura de la OTAN, pero sobre todo advertiría de la necesidad de frenar el *giro liberal* del PSOE en temas relacionados con el mercado de trabajo y la Seguridad Social⁴⁵¹.

Lógicamente no tardaría en llegar el cierre de filas a través de la Secretaría de Imagen de UGT, que dirigida por Miguel Ángel Ordoñez, se convertiría —inclusive por encima de la Secretaría de Organización, dirigida por Antón Saracíbar— en el más eficaz instrumento propagandístico de la central ugetista, y su vez en el más valioso antídoto contra los ataques de Comisiones Obreras⁴⁵². En un *comunicado* de urgencia publicado en la noche del sábado 1 —tras un agitado día de informaciones y contrainformaciones— y que publicaría íntegramente *El País* se optaba por negar cualquier tipo de divergencias, reduciéndolo a meras cuestiones de interpretación y defendiendo la autonomía sindical de UGT. “Este tipo de informaciones, dentro de la opinión de la Prensa Libre en un país democrático, responden posiblemente a distintas interpretaciones personales ajenas al quehacer diario de esta ejecutiva confederal”, rezaba el comunicado en sus primeras líneas. Por si quedaban dudas se afirmaba sin contemplaciones: “En el seno de la Comisión Ejecutiva Confederal no hay diferencias de estrategia sindical por encima de los puntos de vista distintos en un órgano ejecutivo de una organización democrática como es la UGT”. Para concluir reiterando la “demostrada autonomía” de UGT y negar cualquier tipo de “presiones” en las relaciones entre Gobierno y sindicato⁴⁵³. A diferencia de lo que sucedió con CCOO, *El País* no indagaría más por las *miserias internas* de la central socialista, ni tampoco cuestionaría la posible *identidad prosódica, ortográfica y sintáctica* del comunicado.

A partir de entonces, a Corcuera se le mantendría más controlado desde el aparato del sindicato así como de manera progresiva se le iría vaciando de sus respectivas responsabilidades, hasta dejarle en un plano secundario a nivel político y mediático. Una operación que se venía fraguando desde el CC de junio de 1984 y que si bien fracasó en una primera instancia, se lograría, de forma parcial reconducir dicha situación en el Comité Confederal extraordinario de octubre.

Con todo, el propio José Luis Corcuera jugaría un papel notable en el desarrollo de las comisiones del AES. Ahora bien, si la posición política del que era el Secretario de Acción Sindical había condicionado, en gran medida, la marcha del AES evitando mayores *roces* con el Gobierno; la mini-crisis dentro de UGT llevaría a la parte mayoritaria de la dirección a marcar posiciones en un progresivo —eso sí dentro de la más estricta cordialidad habitual entre la

⁴⁵¹ Noticia, Rodolfo Serrano, “Nicolás Redondo se enfrenta al PSOE para impedir que el Gobierno instrumentalice el sindicato”, *El País*, 1 de diciembre de 1984.

⁴⁵² El análisis que proporciona Rubén Vega es concluyente: «La presencia que esta labor procura en los medios de comunicación viene acompañada de un análisis sistemático de la imagen proyectada y de la lógica que rige el tratamiento informativo de los temas laborales realizado con métodos sociológicos de notable rigor científico. Tras constatar que la prensa reserva para la información sociolaboral un espacio relativamente inflexible e independiente de los acontecimientos de cada coyuntura (lo que implica un juego de suma cero en el que la presencia de unos protagonistas se produce a costa de otros y el eco obtenido depende en buena medida de la oportunidad del mismo), se identifican como ejes que dan significado a las noticias la negociación-diálogo-interacción, por una parte, y el conflicto, por otra. Al mismo tiempo, se constata la creciente mediatización por el Gobierno de una acción sindical que ‘comporta cada vez más actuaciones en la esfera política’, donde ‘obviamente, el Gobierno prioriza las demandas, las interpretaciones y las iniciativas’». VEGA, Rubén, *La reconstrucción del...*, *op.cit.*, p. 141.

⁴⁵³ Portada, “UGT atribuye sus tensiones a la diversidad de «interpretaciones personales»”, *El País*, 2 de diciembre de 1984; Noticia, “La Secretaría de imagen de UGT niega que haya tensiones en la ejecutiva”, *El País*, 2 de diciembre de 1984.

familia socialista– distanciamiento político y sindical en relación a las reformas contempladas en el AES.

De esta forma, tras la primera reunión de trabajo de la Comisión de la Seguridad Social del Acuerdo Económico y Social, Redondo declararía a EFE lo siguiente: “A estas alturas todavía no tenemos un solo papel del Gobierno sobre la comisión de la reforma de la Seguridad Social, que ya ha comenzado sus trabajos, y esto es urgente. No vamos a estar jugando a la gallinita ciega”. Y al mismo tiempo reclamaría darle “[a la comisión] una dimensión pública y que cada uno asuma su propia responsabilidad”. Un anuncio acompañado de otro: era más que probable que, a partir de entonces, hubiera *tensiones y conflictos* con el Gobierno “aunque todavía es pronto y no puedo prejuzgar”⁴⁵⁴.

Puestos a la tarea de marcar distancias –a su manera– con el Gobierno, Redondo incrementaría su actos públicos y declaraciones tanto antes como durante como después del XXX Congreso socialista. ¿Formaban aquellas declaraciones parte de una estrategia destinada a *lavar* la imagen de UGT como una organización no acolita y sumisa al Gobierno? O en cambio, ¿se podía esperar un cambio de actitud y de política frente a un Gobierno? ¿Hasta qué punto estaría dispuesta a ceder, de nuevo, en el desarrollo del AES? Independientemente de las respuestas que pudieran darse a los anteriores interrogantes, el tono crítico de UGT no dejaría de incrementarse de cara a dejar asentado, que no compartía con el Gobierno ni su política económica ni menos su postura flexibilizadora liberal. Una respuesta, que como veremos, llegaba algo tarde: tras firmar el AES y aprobarse los decretos que desarrollaban la RET’84.

“[A]lgunos compañeros del PSOE y del Gobierno se sienten incómodos conmigo”, declaraba Redondo en Murcia el 6 de diciembre. Tras indicar que “[n]osotros sólo damos un apoyo crítico al Gobierno” en lo que no dejaba de ser una afirmación un tanto demagógica. Para asimismo afirmar con seguridad: “no creo que se pretenda sustituirme en la secretaría general del sindicato”. Una frase relevadora de que *algo y alguien* estaban moviendo algunas fichas dentro de UGT. Redondo así se trataba de adelantarse a cualquier tipo de movimiento con gran capacidad análisis e intuición, como hemos podido ver en otros apartados de la presente investigación⁴⁵⁵. Un movimiento, por cierto, que años más tarde cuando la unidad de acción con Comisiones Obreras era un hecho consumado, se repetiría desde determinados sectores del PSOE, quien día sí y día también le tildarían de *viejo, antimoderno* y toda una pléyade de adjetivos con los que tratarían de deslegitimarle políticamente y terminar con él (políticamente).

Una campaña de intoxicación que tan bien conocía el propio Marcelino Camacho. De hecho, para Comisiones Obreras y concretamente su Secretario General aquellos primeros desmarques serían muy bien recibidos. “[Hago] un llamamiento a la responsabilidad y reflexión de los trabajadores de UGT y de sus cargos directivos para que luchemos junto con el Acuerdo Económico Social”, declararía el propio Camacho el jueves 6 de diciembre. ¿Habría llegado la hora de la *unidad de acción*? “Nosotros preguntamos a UGT si no ha llegado ya la hora de plantearse una acción conjunta para oponernos a esta política antisindical. Ningún sindicato de clase puede apoyar el AES”, rematando así su propuesta de *dialogo* el mismo Camacho⁴⁵⁶.

A falta de menos de 48 horas de que se inaugurara el XXX Congreso del PSOE –que se celebraría los días 13 al 16 de diciembre– se conocía a través de *El País* –quien prestaría una atención de primera mano a tal evento– la iniciativa de determinados sectores del PSOE y de la UGT de cara a que los aspectos sociales y económicos del AES, empezando por la reforma de la Seguridad Social, se demorarán hasta 1986 o inclusive principios de 1987. Fin propuesto:

⁴⁵⁴ Noticia, “Nicolás Redondo advierte de la posibilidad de que haya tensiones con el Gobierno en el desarrollo del AES”, *El País*, 6 de diciembre de 1984.

⁴⁵⁵ Véase lo apuntado en la *nota 142*.

⁴⁵⁶ Noticia, “Redondo afirma que él resulta incómodo para parte del Gobierno”, *El País*, 7 de diciembre de 1984.

garantizar un año de cierta tranquilidad con el desarrollo de los proyectos que pudieran provocar menor contestación como las leyes de sanidad. Una estrategia de cara a ganar no sólo tiempo sino evitar que “la comisión de la reforma de la SS [Seguridad Social] derivada del AES, para justificar ante la opinión pública que las medidas que se adopten cuentan con el consenso de los interlocutores sociales”. Se dejaría también *caer* a los medios de comunicación que la propuesta de UGT al respecto de la participación de CCOO en la citada comisión había sido rechazada. Impedir un posible “suicidio político” era el objeto de tal maniobra. Presiones que habían tenido cierta acogida al corregir el Gobierno su proyecto inicial de hacer una reforma global, y de un solo golpe, para pasar hablar de un proceso gradual⁴⁵⁷.

Garantizado de antemano el posible riesgo de que el XXX Congreso del PSOE se les pudiera ir a la mano a la CEF del PSOE, y reproducirse una situación similar a la del XXXVIII, tras *blindar*, vía Estatutos, el sistema de elección de delegados a través de lo aprobado en el mismo Congreso extraordinario de 1979 y un par de años más tarde en la Conferencia de Organización⁴⁵⁸; cualquier tipo de debate político también se vería seriamente perjudicado. A lo que sumaría las consabidas dotes organizativas del equipo de Alfonso Guerra para no hubiera sorpresas innecesarias en los debates de las enmiendas, a través de un muy riguroso control de todo el proceso congresual. Así sería.

El duro, amargo y complicado año 1984 terminaría para UGT, tras constatar la cada vez más distancia política, estratégica e ideológica que le separaban del partido hermano, con un *periodo de rectificación* de sus posturas iniciales al respecto del mercado de trabajo. Daba inicio así la apertura de una brecha invisible –antes que visible– que con el tiempo se haría insalvable.

De esta forma, más de un mes después de que aparecieran en el Boletín Oficial del Estado la primer *tanda* de la normativa que venía a desarrollar las figuras contractuales de la RET’84, y también pasadas varias semanas desde que publicara el Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre, *por el que se regulan diversos contratos de trabajo de duración determinada y el contrato de trabajadores fijos discontinuos*; Redondo enviaría una contundente carta a González denunciando que tales *reales decretos* vulneraban el *espíritu* del Acuerdo Económico y Social.

Por fin, se producía la esperada reacción por parte de la central socialista, aunque la misma llegara demasiado tarde, y cuando no había vuelta atrás. Tal y como hemos tenido la ocasión de ver a través de los informes técnicos internos elaborados por la propia central socialista y localizados en el fondo de la Secretaría de Acción Institucional, la preocupación, el enfado así como la creciente sensación de engaño se apoderarían por momentos de UGT.

Matizado esto, en la citada misiva de Redondo, éste denunciaba, en primer lugar, como desde el Ministerio de Trabajo se había actuado de forma unilateral, *saltándose a la ligera* lo acordado en el Capítulo VI, artículo 15 del AES, o al menos haciendo una interpretación sesgada del *supuesto* espíritu que se contenía en dichos párrafos. En concreto, su principal crítica iba dirigida al artículo 5 del RD 2104/1984, relativa a los *contratos de lanzamiento de nueva actividad*, que tanto había dado que hablar durante la negociación del AES, y por el tanto había luchado la CEOE. De hecho, con aquel contrato se cumplían no pocas aspiraciones de la patronal en materia de flexibilización, y que tan *queridas* eran por parte del Ministerio de Trabajo. El Secretario General de UGT se dirigía, pues, al “máximo garante del AES”, afirmando como tales medidas han causado “un profundo disgusto y malestar en UGT”. Indicando a continuación: “En opinión de UGT este Real Decreto es una clara vulneración del espíritu del AES”. Redondo no sólo pedía que se volviera a los acuerdos de noviembre de 1983, en tanto se había “eliminado todas las cautelas que existían en el borrador primitivo”, sino que

⁴⁵⁷ Noticia, Gustavo Matías y Rodolfo Serrano, “Sectores del PSOE y UGT, a favor de aplazar las reformas más duras de la Seguridad Social”, *El País*, 12 de diciembre de 1984.

⁴⁵⁸ Nos remitimos aquí al apartado “4.2.2.2. La irrevocable necesidad de *descargarse de la sobrecarga ideológica*: las lecciones de 1979”.

se *anularán* tales medidas pues “afectan perjudicialmente a los derechos de los trabajadores, puesto que empeoran gravemente la situación de algunos colectivos” y, que, al mismo tiempo, “desnaturalizan radicalmente el tipo de contrato por nueva actividad”⁴⁵⁹.

Dicho esto, ¿la UGT había sido *traicionada* por el Gobierno en lo relativo a la contratación temporal? En principio, y por lo que se conoce a día de hoy, así se puede afirmar. Una tesis esta última que sería respaldada tiempo después por José María Zufiaur, quien hablaría de toda una serie de “incumplimientos y engaños” por parte del Gobierno⁴⁶⁰.

De esta forma, el nuevo *varapalo* por parte del Gobierno volvería a poner otra vez a prueba la *fe ugetista*. Un *fe*, todo sea dicho, ya un tanto mermada tras tantos incumplimientos y tras tantas “sorpresas” en tan sólo dos años. Además, no se podía obviar como habían terminado las negociaciones del AES, con un Redondo que le confiaría al propio Cuevas que *no se fiaba* de González, su compañero socialista de fatigas. Hasta ese punto se había llegado.

La muy lenta *vuelta a la realidad* se transformaría en un duro como amargo camino que la UGT recorrería durante los siguientes meses. Con un Redondo en primera línea y un Corcuera cada vez más limitado en sus movimientos, las denuncias contra la política económica del Gobierno y sus medidas contrarias se convertirían en una tónica cada vez más generalizada, lejos de viejas prudencias y de *silencios* o *apoyos críticos* de antaño⁴⁶¹.

Previamente decididos los miembros que asistirían a cada una de las citadas comisiones en la reunión de la CEC de UGT del 6 de noviembre⁴⁶² –vaya, por delante, que en ninguna acta de las que se tiene constancia en los siguientes meses figura referencia alguna con respecto a los *incumplimientos* del Ejecutivo en relación a los acuerdos en materia de contratación temporal contemplados en el AES– el *factor* Corcuera –el propio José Luis Corcuera elegido como uno de los miembros de la Comisión de Legislación Laboral, junto con Zufiaur y Benjamín Castro– seguiría pesando, pese a los intentos de control y limitación de sus movimientos, hasta que en mayo de 1985 dimitiera de la Ejecutiva⁴⁶³.

De esta forma, y sin que se hubiera alcanzado ningún “acuerdo por arriba” de carácter bilateral y/o trilateral en su caso, entre Sindicato-Partido-Gobierno sobre el tema del *despido libre* se afrontaría el futuro contenido del artículo 17 del AES. Aunque ya sabemos el final de tan tamaño problema, en aquel preciso momento histórico, y dadas las circunstancias, desde UGT no se podían descartar posibles futuras *sorpresas* en clave de concesiones a la patronal. Un escenario así dado, se antojaba potencialmente conflictivo.

⁴⁵⁹ Noticia, “Redondo pide a Felipe González que anule las nuevas normas sobre contratación temporal”, *El País*, 20 de diciembre de 1984.

⁴⁶⁰ Declaraciones de José María Zufiaur a, MARTÍN, Ricardo, *Almunia. Un corredor...*, op.cit., p. 124. Para concluir: «Y luego [...] que la orientación económica se hace cada vez más neoliberal, sobre todo a partir del AES; primero Boyer y luego Solchaga, pero también Felipe González, que hacían declaraciones terribles. Entonces hay un contraste entre la orientación socialdemócrata de la UGT y la posición socio-liberal o neoliberal, en áreas fundamentales del Gobierno [...]. Nosotros habíamos pactado una cosa y él [Almunia] fue mucho más allá». *Ibidem*.

⁴⁶¹ Por citar un último ejemplo: Redondo no dejaría de pasar la oportunidad de denunciar el carácter antisocial del último paquete de medidas que aprobaría el Gobierno en uno de los últimos Consejo de Ministros de 1984, al respecto de la aprobación de la subida del SMI en un 7%. Desde UGT que había solicitado un 9%, se señalaría como «además de ser lesivo para los intereses de los trabajadores, especialmente para los de menor poder económico, se ha fijado sin tener en cuenta el incremento de la inflación». Noticia, Carlos Funcia, “Nicolás Redondo critica las decisiones del último Consejo de Ministros”, *El País*, 28 de diciembre de 1984.

⁴⁶² AHFFLC, UGT-CEC, “Acta nº 27. Reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Madrid, 6 de noviembre de 1984”, sig. 002251-003.

⁴⁶³ Noticia, “Corcuera explica a la ejecutiva de UGT las razones de su dimisión como Secretario de Acción Sindical”, *El País*, 16 de mayo de 1985.

Pero todavía el AES depararía desagradables sorpresas y nuevos varapalos a la central socialista. Por citar tan sólo dos posibles ejemplos, entre otros muchos, de esta cada vez más envenenada como dramática dinámica. En mayo de 1985 desde el Ministerio de Trabajo se cerraría la *última pata* del *pack legislativo* flexibilizador de la RET'84. Nos referimos al futuro Real Decreto 799/1985, de 25 de mayo, *por el que se incentiva la contratación de jóvenes trabajadores y se extiende esta medida a determinados programas y contratos vigentes*. Una figura claramente liberalizadora, aunque todavía lejana al futuro contenido del PEJ, que levantaría, no obstante, todas las alarmas por parte de la central socialista. La historia aquí, como en otros tantos casos, se repetiría teniendo por *inesperados protagonistas* a los jóvenes. Pese a la presencia de UGT en la Comisión de Legislación Laboral del AES, vería, de nuevo, como desde Trabajo se procedía a ignorar sus peticiones y reclamaciones. En esta tesitura el propio Zufiaur escribiría a Álvaro Espina en las citadas fechas, solicitándole que se introdujeran toda una serie de medidas correctoras para evitar, entre otras cuestiones, el “efecto de sustitución que se podría producir en su aplicación”⁴⁶⁴. No serían escuchadas, produciéndose otro *nuevo varapalo* a las tesis ugetistas al respecto.

Pero la lista de agravios al final 1985 era todavía mucho mayor, por más, públicamente a la UGT le tocaría el incómodo papel de seguir defendiendo el AES en su conjunto⁴⁶⁵. En un documento de la Secretaría de Acción Institucional se presentaría una larga lista de incumplimientos. Limitándonos a tres posibles, entre otros muchos, se hablaba de que “no puede alcanzarse la cobertura a desempleados del 43% en diciembre”; “no se hizo la reforma de la Seguridad Social a través de la Comisión Tripartita por total desacuerdo”; o, directamente, se denunciaba como se “adoptaron medidas unilaterales en cuanto a nuevas modalidades de contratación”⁴⁶⁶.

Así pues, y como anunciáramos cuando examinamos el propio contenido del AES, desde el Ejecutivo pero más concretamente desde Trabajo se moverían de forma astuta y, en la mayor parte de los casos, de forma inteligente, todas y cada una de sus piezas. Ello con tres claros objetivos: primero, intentar buscar un muy difícil equilibrio por medio de un singular reparto de medidas *supuestamente* favorecedoras a cada parte sin que se rompiera el propio acuerdo, tal y como acabamos de ver en la sucesión de medidas laborales adoptadas y aprobadas; segundo, se trataría, asimismo, de encajar cada una de estas piezas, paso a paso, de la mejor forma posible dentro de la lógica liberal del proyecto de modernización socialista; y tercero, sabedores que el Gobierno era en última instancia el mayor garante del propio AES, no

⁴⁶⁴ AHFFLC, UGT-CEC, “Carta al Secretario General de Empleo de José María Zufiaur – Secretario de Acción Institucional–”, Madrid, mayo de 1985?, sig. AI-411-01, localizada en el Fondo de la Secretaría de Acción Sindical.

⁴⁶⁵ No faltaron las habituales glosas al citado acuerdo en los siguientes meses y años: «[E]l balance final, desde la perspectiva de UGT, es satisfactorio. Han menudeado las crispaciones, los ataques verbales y también las confrontaciones de fuerzas. [...] Juzgado en términos globales el AES es el mejor acuerdo interconfederal firmado en España. Entre otras cosas, ha permitido que se pongan los cimientos de la evolución sindical que se dirige hacia un sindicalismo metido en las instituciones del Estado, un sindicalismo de participación, que está o intenta estar presente allí donde se toman las decisiones. La presencia en múltiples comisiones de trabajo junto a la Administración y la patronal ha facilitado este conocimiento del aparato administrativo. No cabe duda que después de la experiencia del AES, UGT es un sindicato mucho más eficaz». DOMÍNGUEZ, Justo, “Diez años de relaciones laborales industriales en España” en ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos...*, op.cit., p. 98.

⁴⁶⁶ AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Institucional, “Nivel de cumplimiento del AES. Año 1985”, sig. AI-612-01. En otro documento adjunto titulado *AES pendiente para 1986*, se tenía por objetivo, entre otras aspectos, tres elementos a conseguir a lo largo del siguiente año: «Agotamiento del Fondo de Solidaridad [...]; Recuperación del 0,28% de cotización que se aportó, en 1985, al Fondo de Solidaridad [...]; Constitución del Consejo Asesor del Presidente». Véase asimismo, AHFFLC, UGT, Secretaría de Acción Institucional, “Comisión de Seguimiento AES. Madrid, 7 de noviembre de 1985”, sig. AI-612-01.

se tendría problema en incumplirlo cuando hiciera falta, una vez asegurada una relativa *paz laboral* que no *social*. Precisamente, la instalación y consolidación de esta perversa dinámica – de la que venimos hablando– por parte del Ejecutivo, capaz de jugar a varias bandas cuando no de manipular a sus firmantes, se constituiría el mejor como en el más sucio secreto del éxito del AES. Todo ello con un fin evidente: la legitimación del proyecto de modernización socialista⁴⁶⁷.

12.4. El «gran salto adelante». El desarrollo legislativo de la RET'84: examen de las bases político-institucionales y de los mecanismos jurídicos de la formación histórica de la «cultura empresarial de la precariedad»

«[La reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 es] el hito más importante en el marco legislativo [...] tanto por la extensión temporal de su vigor como por las reformas que introdujo, que desarmaron, si quedaba alguna duda, el principio de estabilidad en el empleo».

Ignacio FLÓREZ SABORIDO, *La contratación temporal como medida de fomento del empleo*⁴⁶⁸.

«En efecto, la temporalidad del empleo fue el instrumento al que recurrieron en exclusiva los empresarios para satisfacer sus exigencias de adaptar las condiciones de sus empresas a las cambiantes necesidades del mercado y hacer frente en condiciones de competitividad a los nuevos retos y a los nuevos espacios económicos. Y de este modo, la temporalidad sustituyó otras formas de adaptabilidad y flexibilidad probablemente más útiles y menos costosas socialmente».

Alberto ELORDI, *Trabajo, temporalidad y empresas de trabajo temporal en España*⁴⁶⁹.

Con la aprobación de la Ley 32/1984 en agosto de 1984 se complementaría la transición democrático-liberal del modelo español de relaciones laborales. De este modo, en apenas una década se pasaría del modelo paternalista franquista a la flexibilización como modelo. Como se ha insistido en más de una ocasión, la principal característica definidora de la RET'84 en su conjunto será la gran estabilidad que daría al mercado laboral en su vertiente contractual. Casi ocho años permanecería vigente en el tiempo. Todo un record. Una reforma que se mantendrá en sus aspectos fundamentales hasta los años 1992-1994, cuando se acometería la segunda gran reforma liberalizadora del mercado de trabajo por parte del Gobierno socialista en su tercera legislatura, en una coyuntura marcada por la breve pero intensa crisis económica de los primeros años noventa⁴⁷⁰.

De entrada, se ha tener presente –como se ha insistido en múltiples ocasiones– como con la RET'84 se produciría tal ampliación de las posibilidades relacionadas con la contratación temporal, que, en la práctica, significaría su definitiva *universalización*. “Universalización” pero también *legitimación*, como ocurría con el modelo socio-económico producto de la

⁴⁶⁷ Como explicó en su día Oliet Palá: «Pero esta ambigüedad calculada fue la táctica que permitió al Presidente presionar de forma efectiva y obtener finalmente el asentamiento de ambas partes». OLJET PALÁ, Alberto, *La concertación social...*, op.cit., p. 190.

⁴⁶⁸ FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal...*, op.cit., p. 106.

⁴⁶⁹ ELORDI, Alberto (coord.), *Trabajo, temporalidad y empresas de trabajo temporal en España*, Madrid, Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), 2001, p. 83.

⁴⁷⁰ Nos remitimos a lo apuntado en *Presentación, nota 136*.

estrategia modernizadora socialista. Se pondría fin, así, a no pocos años de titubeos mediante las conocidas *cuñas-flexibilizadoras*.

Desde aquel mismo instante, no sería posible una vuelta atrás en adelante. O dicho en otros términos: con la Ley 32/1984, se produciría el verdadero *gran salto delante* de nuestro ordenamiento jurídico-laboral. Pese a lo anterior no faltarían, desde el primer instante, nuevos proyectos legislativos “reformistas”, así como las declaraciones de políticos, técnicos –bien acompañados y escoltados por los expertos y algún que otro investigador– que cuestionarían sus insuficiencia en términos flexibilizadores. Una dinámica que se iba a reproducir hasta el presente histórico vivido.

Vaya también por delante, que cuando se aprobaría en agosto de 1984 la RET’84, ya había sobradas evidencias estadísticas de los posibles efectos negativos de la expansión fáctica de la contratación temporal. Llámese los *efectos no queridos* y/o los *efectos deseados* de la flexibilización laboral, tras todo lo acontecido entre octubre de 1976 a julio/agosto de 1984, también se había constatado, igualmente, la utilización masiva de este tipo de figuras por parte de los empleadores como primera vía a contratar, fuera o no la labor a realizar de carácter temporal. Así pues, y aunque resulta en extremo complicado fijar, con precisión, un punto inicial del origen de la formación histórica de la “cultura empresarial de la precariedad laboral”, sin duda, la RET’84 se constituiría en uno de sus puntos de inflexión más determinantes. Asimismo, quédese cotejado, que si se asistiera a la formación y consolidación de esta nueva realidad económico-social, sería tanto por el uso de los empresarios como por una decidida voluntad política que promocionaría, de forma insistente, este tipo de figuras, caracterizándose, asimismo, por su inanición ante su masivo empleo cuando no fraudulento. Tan sólo sería a principios de los noventa, cuando se empezaría –y de forma tibia en una primera como prolongada *fase de reacción*– a cuestionar los posibles *adversos efectos* del modelo español de temporalidad para la marcha para el conjunto de la economía de la nación.

En las siguientes líneas, y una vez realizado el recorrido por las negociaciones que condujeron tanto a la RET’84 como al AES, toca examinar su desarrollo legislativo en una perspectiva eminentemente jurídica. Por lo demás, y como se ha dejado apuntado tanto en el Apartado 10 como en este mismo Apartado 12, se incluirán en las siguientes páginas un análisis comparativo de la redacción final de la Ley 32/1984 y de los diferentes RRDD, con respecto a los documentos aprobados en noviembre de 1983⁴⁷¹ y a la primera versión de los futuros Reales Decretos que UGT tenía en su poder desde, al menos, el 23 de julio⁴⁷². Quede aquí también constado, por segunda vez, que no se ha podido localizar la segunda versión de este último documento citado, fechado un 4 de octubre, y sobre el que se negociaría y se acordaría el AES. Pese a este notable vacío documental, se puede comprobar la línea y dirección de las principales modificaciones sin mayores contratiempos.

De esta forma, se pone punto y final a esta investigación. Así pues, nos toca internarnos por los nuevos criterios de regulación dominantes por los que optaron los ejecutivos socialistas tras estos frenéticos años, y que terminarían quebrando “los valores de ordenación del Derecho del Trabajo, dando vida a una dualidad de los ordenamientos”⁴⁷³.

Entre los posibles rasgos a la hora de definir a la RET’84, desde una perspectiva global, cabe destacar como la misma se caracterizaría por su unidireccionalidad, basada en la formulación de lo que bien se puede denominar como una *legislación de la flexibilidad*, “en la

⁴⁷¹ AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Organización, “Comité Confederal Extraordinario celebrado en Madrid el 6 de octubre de 1984”, sig. 002607-003.

⁴⁷² AHFFLC, UGT-CEC, Secretaría de Acción Institucional, “Carta de José María Zufiaur – Secretario de Acción Institucional– a las Federaciones Estatales Industria”, sig. AI-14-02.

⁴⁷³ CASAS BAAMONDE, M^a. Emilia, “La reforma del Derecho del Trabajo. Diez años de legislación laboral: 1985-1995”, *Relaciones Laborales*, nº 1-2, (1996), p. 74.

que sus formulaciones tienden hacerse completas, se convierten en programas precisos de acción normativa y actúan a la ofensiva, sin encontrar resistencias eficaces”⁴⁷⁴.

Por cuestiones tanto políticas como eminentemente prácticas no se cuestionaría, en momento alguno, la presunción del contrato indefinido que se establecería en el siempre citado artículo 15 del ET⁴⁷⁵. En verdad, no haría falta para los objetivos buscados. Pero la realidad práctica –lejos de la teoría y de ciertas presunciones– sería radicalmente diferente. Lo cierto es que por más que no se tocara el citado artículo, el mismo no impediría la *universalización* definitiva de la contratación temporal “no” causal y de fomento del empleo. O explicado en otros términos de más largo como técnico alcance: la clave para explicar, en términos jurídicos, la universalización de la contratación temporal residiría en cómo el empleador, en adelante no tendría que demostrar la *causa objetiva* para justificar la modalidad de contratación temporal elegida. Es decir, se elimina el principio del *iuris tantum*.

El segundo punto fuerte de la reforma laboral se localizaría en cómo la misma afectaría, de forma exclusiva, a los trabajadores que entrarían en el mercado de trabajo, y de forma específica a la siempre mencionada generación del “baby boom”. Un elemento diferenciador que conduciría a lo que Javier García de Polavieja, con buen criterio, definiera en su día como el proceso de “segmentación horizontal”. Un proceso con hondas repercusiones que marcaría, en adelante, una fuerte línea divisoria entre *insiders* –a quienes, en la práctica, no se les recorta

⁴⁷⁴ CASA BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y...”, *op.cit.*, p. 321. O como acertadamente ha señalado S. Torrente cuando afirmada como se ha «presentado la flexibilidad laboral bien como una encubierta negación de los fines del Derecho del Trabajo, bien como un conjunto de soluciones coyunturales para salir de la crisis». TORRENTE GARI, Susana, “Flexibilidad laboral y concertación” en MONEREO PÉREZ, José Luis (coord.), *La reforma del...*, *op.cit.*, p. 85.

⁴⁷⁵ Para el profesor Miguel Rodríguez-Piñero con la entrada de la citada reforma se va a producir un recorte ostensible de este principio jurídico: «En resumen, el artículo 15 mantiene en su integridad la regla de la preferencia de la contratación indefinida, si bien sin el rigor extremo de reestructuración de la contratación temporal que establecía la Ley de Relaciones Laborales, puesto que tras la Ley 32/1984, y sobre todo tras los reglamentos que la desarrollan, las excepciones se reducen sensiblemente la operatividad de tal preferencia, que, sin embargo, se mantiene formalmente como regla y principio». RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “La contratación temporal en la Ley 32/1984 y en los decretos de desarrollo” en id. (coord.), *Comentarios a la nueva...*, *op.cit.*, p. 92. Por lo demás, véase aquí el artículo del Magistrado del Tribunal Supremo, MARTÍN CORREA, José M^a, “La duración del contrato (En torno al artículo 15)”, *Revista española de Derecho del Trabajo* n^o 100, (2000), pp. 480-495. No obstante la jurisprudencia, en este sentido, mostraría –durante una primera fase que se puede hacer llegar hasta los primeros años noventa– por mantener el contrato indefinido como opción preferente. Tal y como señalaron los Magistrados Luis Gil, Manuel Iglesias y Fernando Roa, «el legislador ha mostrado su decidida preferencia por el contrato indefinido como instrumento jurídico eficaz destinado a dar garantía de estabilidad al trabajador, y en este sentido el ET, en su art. 15, establece una presunción a su favor y el mismo artículo en su apartado 3 [...] la sanción consiste en una renovación de los contratos temporales celebrados en fraude de Ley, que se transforman en indefinidos (S.T.S. de 23-10-84) [...]. La presunción del carácter indefinido del contrato de trabajo, según el art. 15.1. del ET, no excluye la contratación temporal, cuyo fundamento y causa se encuentra en la finalidad de cada contrato (S. T.S. de 27-3-85)». En el mismo sentido expresaban su opinión en relación a la introducción de la contratación temporal y la jurisprudencia *ad hoc*: “El contrato de trabajo se entiende como regla general, concertado por tiempo indefinido, según el art. 15 del E.T., que admite, asimismo, y únicamente por excepción, la temporalidad tan sólo en aquellos casos específicos que en él se enumeran, sin perjuicio, claro está, de las modalidades que con toda precisión concreten, con indicación de las causas que las motivan y circunstancias que han de concurrir con el carácter constitutivo, los convenios colectivos, cuyos pactos, salvo los que puedan afectar a las normas sustantivas del Derecho social, a los principios básicos que los sustentan, y en su caso al *ius cogens*, han de observarse plenamente sin eliminar ninguno de ellos, pues de lo contrario, se eliminaría el sinalagma contractual y se destruiría la unidad del contrato que forma parte de su propia esencia (S.T.S. de 22-4-85: siguen criterio análogo las SS.T. S. de 9-12-83 y 22-3, 30-6 y 21-12-84)». GIL, Luis, IGLESIAS, Manuel y ROA, Fernando, *Estatuto de los Trabajadores: amplia Jurisprudencia, más de tres mil sentencias, comentarios*, Madrid, Colex, 1992, pp. 164 y 167, respectivamente.

ningún derecho inmediato, pero cuya posición de fuerza se verá mermada a corto-medio plazo por las propias dimensiones que adquiriría la cultura de la temporalidad— y a los *outsiders*, a quienes van destinadas, de forma específica, estas medidas⁴⁷⁶. Por tanto, a la par que se modificaban los mecanismos de entrada, estos serían *compensados* por el “mantenimiento de los dispositivos de salida del empleo”⁴⁷⁷, tal y como se ha mantenido en relación a los puntos *no negociables*, entonces, para las fuerzas sindicales. Por cierto, para los socialistas —poco propensos a las críticas y no exentos de cierto voluntarismo analítico en este campo— el origen de la dualización social no estaría en este conjunto u otros similares de reformas legislativas, sino en una cuestión más banal: “El dualismo no lo introducían las medidas de política económica, sino que estaba ya presente en nuestra sociedad y adoptaba su forma más drástica en la cortadura existente entre los que tenían y los que no tenían empleo”⁴⁷⁸.

La tercera característica reseñable de la RET’84 no es menor, y nos conduce a internarnos por la metamorfosis interna misma de las funciones reguladoras del Derecho del Trabajo. Lejos de las justificaciones con las que se presentarían y defenderían la LRL o el propio ET —tal y como se advirtiera a lo largo del Capítulo 9⁴⁷⁹— el objeto básico de la Ley 32/1984, ya no será la creación de empleo en consonancia con toda la *lógica liberal*, que definiría al proyecto de modernización socialista. Encontramos aquí una de las claves del gran valor político-estratégico pero también económico dada a esta fundamental reforma legislativa. De hecho, la Ley 32/1984, de 2 de agosto, *sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores*, se define programáticamente en consonancia con la búsqueda de las condiciones objetivas que aseguren el crecimiento económico como paso previo a la creación del empleo.

Por tanto, estamos ante un cambio de calado en la redefinición del Derecho del Trabajo. El propio DT tendría que asumir como propia la “lógica racionalizadora del cambio sustancial acaecido en los procesos productivos y en las relaciones sociales”⁴⁸⁰. O explicado en términos históricos: también por esta misma vía los técnicos y políticos socialistas —por este orden y no otro— asumirían una parte central de los nuevos postulados (neo)liberales en boga⁴⁸¹. Propuesta como una solución temporal en el tiempo mientras que persistiera la crisis económica, muy pronto la apuesta flexibilizadora socialista adquiriría la *condición de irreversible*, hasta pasar a formar parte del *corpus doctrinario* político-laboral del socialismo español. Y claro está que la misma se presentaría como la única política posible. O en palabras de María Emilia Casas, Antonio Baylos y Rafael Escudero, la “asunción de la temporalidad y eventualidad [se presentaría] como la única forma de creación de empleo”⁴⁸².

«La adaptación del marco institucional que regula el mercado de trabajo a las nuevas circunstancias de la economía

⁴⁷⁶ GARCÍA DE POLAVIEJA, Javier, *Estables y precarios...*, *op.cit.*. Una visión, en buena parte, contrapuesta se puede localizar en, HERNANZ MARTÍN, Virginia, *El trabajo temporal...*, *op.cit.*, en concreto en el Capítulo II, “El marco institucional y la evolución de la contratación temporal” (pp. 59-111).

⁴⁷⁷ CACHÓN, Lorenzo, *Políticas de inserción...*, *op.cit.*, p. 94.

⁴⁷⁸ ESPINA, Álvaro, *Empleo, democracia y...*, *op.cit.*, p. 209.

⁴⁷⁹ Nos referimos, en concreto, al apartado, “9.3. Breve historia de la contratación temporal en España durante la transición postfranquista. Del *Derecho de Trabajo de la crisis* a la *institucionalización de la temporalidad* (1976-1982/1983)”.

⁴⁸⁰ CASAS BAAMONDE, M^a Emilia y VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Diversidad y precariedad...”, *op.cit.*, p. 246.

⁴⁸¹ Nos remitimos aquí a lo expuesto en el apartado “6.2. La «salida progresista» a la crisis”.

⁴⁸² CASA BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y...”, *op.cit.*, p. 329.

española, tras la crisis económica del último decenio, constituye una necesidad imperiosa en orden a conseguir que las perspectivas de un crecimiento económico futuro, más sustancial que en los últimos años, se traduzcan en la creación del mayor número de empleos posibles, objetivo fundamental y prioritario del programa del Gobierno».

Exposición de Motivos de la Ley 32/1984

El anterior párrafo corresponde a las primeras líneas de la *Exposición de Motivos* de la Ley 32/1984. Un texto que encaja, sin problema alguno, en la *narrativa socialista* al uso, y por lo el cual se dejarían evidenciados los objetivos gubernamentales. Objetivos siempre en una misma y única dirección, y que tendrían por fin mejorar y favorecer las condiciones necesarias para la reproducción del capital como acabamos de advertir:

«El objetivo central de estas modificaciones es dotar al marco legal de una mayor claridad y estabilidad para reducir la incertidumbre empresarial de las actuaciones que conducen a la creación de nuevos puestos de trabajo y en el necesario ajuste de la demanda a las características de la oferta de trabajo. Al mismo tiempo se persigue facilitar la inserción de jóvenes trabajadores y la vuelta de trabajadores desempleados a puestos de trabajo generados por el proceso productivo».

No hay, por tanto, ningún tipo de “agenda oculta” tras esta normativa. Se expone, de hecho, toda la filosofía político-laboral del socialismo español tras una fase de dudas como de indefinición buscada. Todo ello con otra característica que, como hemos hecho referencia, se convertiría en una de las grandes obsesiones de los ejecutivos socialistas:

«La intensidad alcanzada por el paro juvenil aconseja perfeccionar las formas contractuales que permiten la integración progresiva de estos colectivos en el trabajo, a través de los contratos en prácticas y para la formación, los contratos a tiempo parcial y la nueva figura del contrato de relevo. Todas ellas ampliamente utilizadas en los países occidentales, en los que también se observa una situación de paro juvenil preocupante, como medio para que los jóvenes encuentren la posibilidad de una etapa de adaptación al trabajo a la salida del sistema educativo y para que se creen puestos de trabajo que les permitan familiarizarse con la vida laboral y completar la formación a través del trabajo»⁴⁸³.

No se puede escapar tampoco, tras tantas páginas dedicadas al asunto, como con las anteriores palabras se formula la tesis de un “supuesto problema social” identificado con el paro juvenil, para el que se ofrecería, asimismo, un único camino, una única solución: los contratos en prácticas, y de formación, los de tiempo parcial y la nueva figura de relevo.

Además de la modificación del artículo 33, de la derogación del artículo 56 del ET de 1980 todos ellos correspondientes al Título I –a lo que habría que sumar otras tantas modificaciones en el Título II en relación a la LOLS– la reforma de la RET’84 publicada en el BOE un 4 de agosto se centraría en el artículo 11 –*contratos en prácticas y para la formación*– el artículo 12 –principal aunque no únicamente en el *contrato a tiempo parcial* mediante la derogación de la Disposición Transitoria tercera del ET’80⁴⁸⁴– el artículo 15 y el artículo 17.3.

⁴⁸³ Exposición de Motivos de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, *sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores*.

⁴⁸⁴ «La derogación de la Disposición Transitoria tercera del Estatuto de los Trabajadores se dirige también a homologar la situación española con la de otras economías occidentales, en las que el trabajo a tiempo parcial ha adquirido un grado de difusión desconocido en España, y altamente satisfactorio, al cumplir tres objetivos deseables: satisfacer los deseos de un parte de la población dispuesta a trabajar en jornada incompleta, disminuir la unidad mínima de trabajo que las Empresas pueden contratar y, en general, obtener por esa vía un reparto del trabajo disponible de carácter estrictamente voluntario. El contrato de relevo viene a completar esta posibilidad de reparto de trabajo, mejorando además el bienestar social de trabajadores con edad próxima a la de jubilación. La experiencia europea indica que estas formas de contrato son particularmente utilizadas por personas que acceden por primera vez a un puesto de trabajo, lo que facilita la adaptación del trabajador y le permite además simultanear su actividad laboral con otras actividades domésticas o formativas». Exposición de Motivos de la Ley 32/1984, de 2

Como se mostraría antes, durante y después de las negociaciones de noviembre de 1983 como a lo largo del debate parlamentario entre febrero a julio de 1984 –en donde escasas serían las modificaciones más allá de algunas mejoras o aclaraciones sin cuestionar lo central de lo pactado entre Trabajo y UGT– la principal novedad, en términos legislativos hasta transformarse, de hecho, en una figura nueva y sin antecedentes, sería la de *lanzamiento de nueva actividad*. De su relevancia tan bien da buena cuenta la citada *Exposición de Motivos*, por medio de argumentos técnicos de derecho comparado cuestionables:

«Uno de los aspectos generalmente considerados como obstaculizadores de la contratación es el de la escasa seguridad jurídica de la normativa sobre contratación temporal hasta ahora vigente.

La Ley establece una vía adicional para la celebración de contratos de trabajo de duración determinada cuando se trate de lanzamiento de una nueva actividad, durante sus primeros tres años de funcionamiento. Se pretende con ello disminuir los riesgos en que incurren las nuevas inversiones, hasta tanto esas actividades no hayan encontrado perspectivas de plan viabilidad para su consolidación.

La nueva regulación de esta modalidad de contrato tiene vocación de permanencia y su integración en nuestro ordenamiento se produce al hilo de las orientaciones que en esta materia sigue la Comunidad Económica Europea».

Por lo demás, y en referencia a las modificaciones vinculadas de forma estricta con la contratación temporal como medida de fomento del empleo, se introduciría aquí, la fórmula “en tanto subsistan las actuales circunstancias” –como uno de los requisitos claves para lograr el apoyo de UGT– para afirmar a continuación: “queda regulado de forma más clara y con mayor seguridad jurídica, introduciendo además el derecho a una compensación económica al termino de los mismos”, con el fin de “reducir las diferencias existentes entre estos y los contratos por tiempo indefinido”.

«Una y otras figuras de contratación temporal tienen por objetivo la creación de empleo, pues se trata de incentivar el que las empresas funcionen en cada momento con el mayor volumen de empleo posible, sin esperar a la consolidación de las nuevas actividades o a la confirmación de la reactivación de la demanda en el mercado».

¿Cuáles fueron las principales modificaciones en el artículo 11, artículo 15 y el artículo 17 con la aprobación de la Ley 32/1984, de cara a analizar la universalización de la contratación temporal (supuestamente) causal como por la vía del fomento del empleo? En relación a la nueva redacción del artículo 11. *Trabajo en prácticas y para la formación*, se asiste a un texto más amplio como concreto, como paso previo de una futura política de empleo juvenil que se desarrollará en los siguientes años.

A partir de las propias líneas maestras establecidas en el documento de Trabajo de noviembre de 1983, apenas se registran –como se ha adelantado– grandes modificaciones entre lo pactado y lo publicado en el BOE. Más allá de ligeros retoques en el artículo 11.1 en relación a los destinatarios, empero, se mantendría como los jóvenes trabajadores podrían acceder a un contrato en prácticas hasta los cuatro años después de haber obtenido su correspondiente titulación⁴⁸⁵. Dicho esto, lo relevante se encuentra en el artículo 11.1, en donde se va a ampliar

de agosto, *sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores*.

⁴⁸⁵ En el texto de noviembre de 1983 se podía leer: «11. Podrán concertar contrato de trabajo en prácticas quienes estuvieran en posesión de titulación universitaria superior, o de grado medio así como de formación profesional de segundo y tercer grado, o del BUP, dentro de los cuatro años inmediatamente siguientes a la terminación de los estudios correspondientes a su titulación». Y ya en la Ley 32/1984 el citado artículo quedaría redactado de la siguiente forma: «Podrán concertar contrato de trabajo en prácticas quienes estuvieran en posesión de titulación universitaria o equivalente del título de Bachiller o de otras titulaciones que habiliten legalmente para la práctica profesional, dentro de los cuatro años inmediatamente siguientes a la terminación de los estudios correspondiente a su titulación». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Proyecto de reforma del mercado de trabajo”, Madrid, noviembre de 1983, sig. 02606-001, y, Ley 32/1984, de 2 de agosto, *sobre modificación de*

de dos a cuatro años el tiempo para que los titulados pudieran realizar el contrato en prácticas. Y matizando en el artículo 11.1c el tiempo y salario:

«En el contrato se establecerá la duración del mismo, que no podrá ser inferior a tres meses ni exceder de tres años, así como la redistribución del trabajo en prácticas, de acuerdo con lo que se establezca en los Convenios sin que, en su defecto pueda ser inferior a la base mínima de cotización de la categoría profesional correspondiente, en proporción a la duración de trabajo adecuada».

También por esta vía se producirá una considerable ampliación, en tanto en el ET'80 la duración del contrato no podría “ser superior a doce meses en total” –artículo 11.3–. Igualmente en el punto 12.2 se alterarían sustancialmente las denominadas “fases del proceso formativo”, para el *contrato para la formación*. De hecho, aquí se llevaría cabo una nueva redacción más larga como aclaratoria del texto pactado en noviembre de 1983⁴⁸⁶. En concreto, se afirmaría:

«Los tiempos dedicados a enseñanza podrá concentrarse o alterarse con los del trabajo efectivo en la empresa, según las fases del proceso formativo que se fije en el contrato y sin que el tiempo global correspondiente a aquella pueda ser inferior a un cuarto ni superior a un medio del convenido en el contrato».

Asimismo se señalara en cuanto al salario para este tipo de contrato lo siguiente: “La retribución será la que legal o convencionalmente corresponda al trabajar en proporción a las horas de trabajo efectivo”. Más aún, pues, se dejaría asentada la voluntad del legislador de subvencionar este tipo de contratos –tanto los de *prácticas* como *para la formación*– mediante el artículo 11.3:

«El Gobierno determinará las peculiaridades en materia de Seguridad Social aplicables a este tipo de contratos y en particular podrá establecer exenciones o reducciones en la cotización a la Seguridad Social, que en todo caso se efectuará en razón de la remuneración total percibida»⁴⁸⁷.

Queda, así conformada una atractiva vía de contratación juvenil, en donde las ventajas para el empresario eran del todo evidentes. Ventajas y facilidades legislativas, que se serían empleadas, en no pocos casos, de forma ilícita.

Ni una coma ni un punto se movería el artículo 15.1 en su nueva redacción en relación a su versión original: “El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. No obstante, podrán celebrarse contratos de duración determinada”. Junto algún que otro retoque dado al texto de noviembre de 1983 y la redacción final de la Ley 32/1984⁴⁸⁸, que poco o nada alteraba inclusive la versión original del ET'80, se añadiría, primero, el punto 15.d:

«Cuando se trate de lanzamiento de una nueva actividad. En este caso, la duración de los contratos no podrá exceder de tres años. Transcurrido un plazo de tres años desde el

determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, respectivamente.

⁴⁸⁶ «La jornada, como quiera que fuese computada, se distribuirá de forma que un cuarto como mínimo y la mitad como máximo corresponda a enseñanza teórica y el resto a trabajo efectivo». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Proyecto de reforma del mercado de trabajo”, Madrid, noviembre de 1983, sig. 02606-001.

⁴⁸⁷ Quede constatado también aquí como tras el paso parlamentario se añadiría la última frase en un intento de concretar las posibles ayudas.

⁴⁸⁸ En el texto de noviembre del ochenta y tres se podía leer: «Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aún tratando de la actividad normal de la empresa. En tales casos el contrato tendrá una duración máxima de seis meses, dentro de un período de doce meses». Ya en la Ley 32/1984, se añadiría al final las siguientes palabras: «y deberá expresarse causa determinante de su duración». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Proyecto de reforma del mercado de trabajo”, Madrid, noviembre de 1983, sig. 02606-001, y, Ley 32/1984, de 2 de agosto, *sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores*.

lanzamiento de la nueva actividad, los trabajadores que continúen contratos lo serán por tiempo indefinido»⁴⁸⁹.

Sumada a esta importante novedad, también se introduciría un nuevo artículo. En concreto el 15.2:

«Podrán también celebrarse contratos de trabajo de duración determinada en atención a las circunstancias previstas en el apartado tres del artículo diecisiete, cuando el Gobierno haga uso de la autorización prevista en el mismo».

Por lo demás, finalmente, en la nueva redacción, y entre otros aspectos legislativos novedosos, se reestructuraría el antiguo artículo 15.2 a través del artículo 15.5, que va a venir a introducir una favorable *coletilla* a la discrecionalidad empresarial en su última parte:

«Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualesquiera que haya sido la modalidad de su contratación, lo que no hubieran sido dados de altas en la Seguridad Social, siempre que hubiera transcurrido un plazo o superior al período de prueba establecido para la actividad de que se trate, salvo de la propia naturaleza de la actividad o de los servicios contratos se deduzca claramente la duración temporal de los mismos»⁴⁹⁰.

Cabe añadir, un detalle no menor. La incorporación durante la tramitación parlamentaria de un nuevo punto, en concreto, el artículo 15.7 que no estaba presente en la redacción original, y que señalaba algo tan importante como lo siguiente: «Se presumirán por tiempo indefinido los contratos celebrados en fraude de Ley».

El *lego* en Derecho del Trabajo puede interrogarse, lógicamente, si estas pequeñas modificaciones pudieron hacer *girar* de tal forma como la descrita, nuestro ordenamiento laboral cuando así se revisan el artículo 11 o el artículo 15 de *duración del contrato*. La respuesta es afirmativa. Cientos de horas de discusión, críticas, enmiendas se dedicaron a estos *pequeños cambios* que lo cambiarán todo, junto con su posterior desarrollo legislativo. No es que por sí mismos dieran lugar al nacimiento de la “cultura de la temporalidad”. No. Pero sí contribuyeron a crear las tantas veces citadas *condiciones necesarias* claves, para el conjunto de la estrategia de la modernización socialista.

A todo lo anterior se sumaría una nueva redacción del artículo 17.3 –y aquí sí que no habría modificación alguna entre el texto pactado en noviembre de 1983 y la redacción final de agosto de 1984– no sólo más amplia que en la Ley 8/1980, sino que iba, ante todo, a incrementar la potencialidad legislativa de la contratación temporal de fomento del empleo de forma decidida y sin ambigüedad alguna. Y ello, con sólo dos límites: los contratos no podría exceder los tres años y a lo que se sumaría una indemnización económica a su finalización. Cambios, aparentemente, menores pero de una relevancia de primer orden en la posterior evolución de nuestro ordenamiento jurídico-laboral.

«No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá regular medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo que tengan por objetivo facilitar la colocación de trabajadores demandantes de empleo.

⁴⁸⁹ La redacción aquí también se mejoraría desde su texto original, en donde tan sólo se podía leer: «Cuando se trate del lanzamiento de una nueva actividad. En este caso la duración máxima de los contratos será de tres años». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Proyecto de reforma del mercado de trabajo”, Madrid, noviembre de 1983, sig. 02606-001.

⁴⁹⁰ Una *coletilla* presente en el texto pactado entre Trabajo y UGT, que no se *tocaría* pese a modificarse tanto la numeración del artículo como prácticamente toda su redacción: «15.4. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de Ley, y los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, siempre que hubiera transcurrido un plazo igual o superior al período de prueba establecido para la actividad de que se trate. Todo ello sin perjuicio de las demandas y responsabilidades a que hubiere lugar en derecho, salvo que la propia naturaleza de la actividad o servicios contratos se deduzca claramente la duración temporal de los mismos». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Proyecto de reforma del mercado de trabajo”, Madrid, noviembre de 1983, sig. 02606-001.

Cuando se utilice la contratación temporal como medida de fomento al empleo, la duración del contrato no podrá exceder de tres años. La terminación de estos contratos dará derecho a la compensación económica que reglamentaria se establezca.

Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas para fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores desempleados que encuentren dificultades especiales para acceder al empleo. La regulación de las mismas se hará previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas».

Después de este sintético cuadro introductorio en torno a la Ley 32/1984 y sus principales novedades, recorreremos su desarrollo legislativo a partir de las negociaciones del AES, y en concreto en base a lo acordado en su artículo 15. En el siguiente cuadro se especifican sus más relevantes líneas de desarrollo:

Cuadro 1. Líneas básicas del desarrollo legislativo de la Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 (octubre/noviembre 1984-mayo 1985)

1. Contratos de duración determinados de carácter estructural: tras la modificación del Estatuto de los Trabajadores, se introduce “como excepciones al principio general de la contratación indefinida” varias modalidades de contratación: contrato de fin de obra, contrato por circunstancias de producción, contrato de interinidad, contrato por lanzamiento de nueva actividad (Real Decreto 2104/1984).
2. Contratos temporales para el fomento del empleo. Dirigidos a los trabajadores desempleados. Se establece un contrato cuya duración máxima pueda llegar a ser de 3 años y un mínimo de 6 meses, y donde se establecen una serie de limitaciones para evitar su potencial encadenamiento (Real Decreto 1989/1984).
3. Por último se establecen otras modalidades de contratación. Principalmente, cuatro tipo de contratos de fomento del empleo:
 - a. Contrato a tiempo parcial (Real Decreto 1991/1984).
 - b. Contrato de relevo (Real Decreto 1991/1984).
 - c. Contrato de trabajadores mayores de 45 años (Real Decreto 799/1985).
 - d. Contrato por tiempo indefinido de trabajadores jóvenes desempleados menores de 26 años y otros colectivos (Real Decreto 799/1985).

La forma contractual fundamental de la RET’84 se encuentra en el Real Decreto 1989/1984. Estamos, sin ningún género de duda, ante la principal figura precarizadora por excelencia de nuestro ordenamiento jurídico-laboral durante la década de los ochenta, y que permanecerá en el tiempo hasta la entrada en vigor de la RD-L 1/1992.

En base a la nueva redacción del 15.2 y haciendo uso de la “prerrogativa” contenida en el artículo 17.3 de Ley 32/1984 –citándose tanto esta circunstancia en la *Exposición de Motivos* como en el propio artículo 1.1– se optaría por una ampliación fáctica de la contratación temporal como medida de fomento del empleo, separándose del resto de las modalidades contractuales temporales. Para el profesor del Derecho del Trabajo Antonio Martín Valverde, nos encontramos, de este modo, ante una figura que traspasa el sentido adaptativo a la crisis económica y que orienta en su conjunto la reforma del ET de cara a su adaptación al “modelo del liberalismo o laissez-faire colectivo”⁴⁹¹. El objetivo perseguido: eliminar las limitaciones de

⁴⁹¹ MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PINERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la..., op.cit.*, p. 35. Produciéndose a juicio del autor, «la idea del

la anterior legislación, y permitir su utilización sea cual sea la naturaleza del trabajo a cubrir con dicho contrato. Se superarían, entonces de forma definitiva, los primeros años socialistas de ciertos titubeos –en todo casos parciales como hemos tenido la oportunidad de examinar– mantenidos superficialmente con el RD 3887/1982 y el RD 3236/1983 que, de forma progresiva, habían ido prorrogando la Sección Primera del Capítulo II del RD 1445/1982.

Lo anterior no evitaría una aparente “incoherencia legislativa” –ya advertida– al mantener la opción por la contratación de duración indefinida en el artículo 15.1 y apostar de forma clara como principal vía de acceso al empleo por la contratación temporal no causal. Por tanto no es extraño que se haya llegado a señalar como nos encontramos ante una “flexibilización radical de las modalidades de contratación para posibilitar al máximo la utilización de contratos temporales”⁴⁹². A partir de las facilidades dadas para contratar, esta normativa se convertiría en la más utilizada durante el periodo en que está vigente, ya que se asegura al empleador todas las necesarias condiciones para que amplíe su discrecionalidad, hasta cuotas no pensadas con la normativa anterior. O dicho de otra forma más gráfica: nos hallamos ante la figura más definida en consonancia con la *lógica* del proyecto de modernización socialista español, en busca de una mano de obra flexible, barata y dócil.

Se asiste, en suma, a “un verdadero cambio de enfoque de la regulación de la materia: la autonomía privada recupera, a costa de la legislación de derecho necesario, un territorio tan estratégico como el de los pactos sobre la duración de la relación de trabajo”⁴⁹³. Así es. Entre otras razones a destacar, primero, ya que en la misma redacción de su artículo se elimina el carácter coyuntural de dicha medida mantenida en las legislaciones anteriores.

Antes de avanzar, se ha resaltar un pequeño detalle, que no se puede dejar de remarcar con especial insistencia, pues, nos aporta una serie de pistas tanto sobre la *voluntad del legislador* como de la *dirección* de este fundamental RD. Resulta que uno de los “logros” con los que trataría de justificar en su momento la UGT su apoyo a tal figura, estaría en introducir su peculiar *cuña* “mientras persistan las actuales circunstancias de empleo”. Todo ello por y a través de un vano intento por evitar la posible generalización de esta figura. Ahora bien, por más que pasara desapercibido en su día –o cuando menos no le quisiera dar mayor relevancia– tanto en la primera versión original del futuro RD 1989/1984 de noviembre de 1983, presentada bajo el título, “Borrador del Real Decreto de desarrollo del artículo 17.3 del Estatuto de los Trabajadores” como en el “Anteproyecto de Real Decreto por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento” de julio de 1984, pese a incluir, en cada caso, en el artículo 1, aunque en diferentes posiciones tal *cuña*⁴⁹⁴; la misma pasaría en el RD 1989/1984 publicado en el BOE a la *Exposición de Motivos*. O dicho de otra forma, carecería de fuerza normativa. Puede parecer este un detalle, insistimos, menor, pero que abre, en todo caso, la puerta a cuestionar –o, al menos, a releer la voluntad política del Ejecutivo– cuando también se comprueban otros párrafos suprimidos del proyecto original de noviembre de 1983⁴⁹⁵. Si fue motivo de negociación o de una cesión, se desconoce. No obstante, lo cierto, es

legislador de separar la regulación común del contrato por tiempo determinado de la regulación del contrato para el fomento del empleo». *Ibídem*.

⁴⁹² ELORDI, Alberto (coord.), *Trabajo, temporalidad y...*, *op.cit.*, p. 63.

⁴⁹³ MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la...*, *op.cit.*, p. 36.

⁴⁹⁴ AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Proyecto de reforma del mercado de trabajo. Borrador del Real Decreto de desarrollo del artículo 17.3. del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, noviembre de 1983, sig. 02606-001; AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Anteproyecto de Real Decreto por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo. Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1983, sig. AI-14-02.

⁴⁹⁵ Nos referimos aquí a la inicial *Disposición Final* en donde se podía leer: «1. El gobierno suministra trimestralmente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, la

que el citado RD tendría una “vocación de permanencia”⁴⁹⁶. Como acertadamente se afirmaría en el llamado *Informe Segura*:

«Esta supresión puede ser indicativa tanto del convencimiento de que a corto plazo estas circunstancias no van a cambiar como, lo que sería más importante, de la admisión de estar ante modalidades de contratación que van a existir permanentemente, olvidada la ilusión de su carácter temporal»⁴⁹⁷.

Pero sobre todo, más allá de que se hablara y se justificara en su momento oportuno de que se trataba de una figura que buscaba una adaptación a la crisis económica, tal argumento sería empleado “como contexto o como simple pretexto, (que) desarticuló en España el principio de estabilidad en el empleo. O por mejor decirlo, desterró el principio de causalidad en la contratación temporal”⁴⁹⁸.

información necesaria a fin de evaluar la efectividad de esta medida de fomento de empleo que se establece mediante este Real Decreto. 2. En función de la evaluación que se realice anualmente, se valorará conjuntamente con los interlocutores sociales citados las repercusiones sobre el mercado de trabajo del contenido del presente Real Decreto». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Proyecto de reforma del mercado de trabajo. Borrador del Real Decreto de desarrollo del artículo 17.3. del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, noviembre de 1983, sig. 02606-001.

⁴⁹⁶ Para el propio Antonio Martín Valverde la clave del asunto radica en que «sólo la existencia en la población española de una situación de empleo de especial gravedad parece justificar a los ojos del legislador la quiebra del dogma de la causalidad del contrato temporal que supone la actual regulación de esta modalidad de contrato de trabajo por tiempo determinado». MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la... op.cit.*, p. 37. Por el contrario desde el ámbito gubernamental, y en concreto de Trabajo, se aseguraría, por activa y por pasiva, que en caso de ser utilizadas de manera abusiva tales figuras, las mismas serían reversibles, tal como explicó Álvaro Espina: «Por otra parte hay que tener en cuenta que las nuevas políticas eran controlables y reversibles. Si la contratación temporal como medida de fomento, las ayudas diferentes y los incentivos fiscales, o las bonificaciones en las cotizaciones sociales demostraban ser un instrumento tan poderoso como para desestabilizar la situación por medio de un crecimiento explosivo del empleo que se acogiese a ella, tales medidas podían modularse o abandonarse. Desgraciadamente su eficacia no ha sido tanta». ESPINA, Álvaro, *Empleo, democracia y... op.cit.*, p. 209.

⁴⁹⁷ SEGURA, Julio, DURÁN, Federico, TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel, *Análisis de la... op.cit.*, p. 25. En el mismo *informe* se concluiría al respecto: «Es importante señalar que con este Real Decreto se abre una brecha considerable en el esquema de modalidades de contratación que consagra el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (aunque la posibilidad de dicha brecha estuviera prevista en el propio Estatuto, en cuyo artículo 15.2. encuentra su fundamento de derecho), ya que con arreglo al mismo, en todo caso es posible la contratación temporal de trabajadores desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo. En la práctica, esto implica que es posible que la contratación temporal de cualquier trabajador, porque este requisito siempre puede disponerse, máxime cuando para esta contratación se admite la solicitud nominativa del trabajador que se pretenda contratar a la Oficina de Empleo». *Ibíd.*, pp. 25-26.

⁴⁹⁸ VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, *Las relaciones laborales... op.cit.*, p. 42. Al respecto la opinión de Martín Valverde sería más moderada en el momento. De esta forma, un año después de la aprobación de la reforma, y a pesar de la evidente cuestionamiento del principio de estabilidad, no se podía hablar, en su opinión, de la desaparición del principio teórico por contratación indefinida como opción preferentemente, aunque también apuntaría: «La hipótesis no puede ser descartada en una situación del mercado de trabajo tan grave como la que reflejan las cifras de desempleo a final de 1984. Pero se trataría, en nuestra modesta opinión, de una opción equivocada en cuanto al diagnóstico de las causas de la caída del empleo en España y, desde el punto de vista jurídico, de difícil o imposible compaginación con el reconocimiento constitucional del derecho al trabajo». MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la... op.cit.*, pp. 42-43.

Así en la propia *Exposición de Motivos* se recurría, una vez más, al “eterno” argumento de la rigidez del mercado laboral, y eliminándose, además, la lista de beneficiarios establecida en el artículo 17.3 del ET’80 –“que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores de edad avanzada, con capacidad laboral disminuida, desempleados y de quienes accedan al primer empleo”– por la expresión *trabajadores demandantes de empleo*. En concreto se indicaría en el muy aclaratorio texto:

«La experiencia obtenida con la aplicación de esta medida en los últimos años pone de manifiesto que la regulación de la misma ha sido demasiado rígida y le ha faltado estabilidad, pues se ha visto sometida a continuos cambios y modificaciones en su régimen jurídico, lo que, sin duda, ha influido negativamente en su utilización. Por todo ello se hace necesario, una vez aprobada la Ley 32/1984, proceder a una nueva regulación de la contratación temporal como medida de fomento del empleo, en tanto persistan las actuales circunstancias de empleo, y se impone hacerlo con criterios más flexibles y realistas que en ocasiones anteriores, por lo que resulta conveniente la eliminación de algunas de las limitaciones que han venido caracterizando el régimen jurídico de estos contratos».

Ya su el artículo 1.1 se abría su generalización indiscriminada al indicar que las “Empresas podrán celebrar contratos de trabajo de duración determinada con trabajadores desempleados que figuren inscritos en la correspondiente Oficina de Empleo para realización de sus actividades, cualquiera que fuera la naturaleza de las mismas”. Los *supuestos* rígidos obstáculos de la legislación anterior desaparecerían así de forma absoluta. Asimismo se suprimiría cualquier tipo de referencia a los máximos y mínimos porcentuales de plantilla, como otro de los muchos *frentes de batalla político-laboral* que los socialistas había, previamente, “solucionado” por la vía de los hechos consumados a través de una Orden ministerial de mayo de 1983⁴⁹⁹.

Junto con otros detalles no menores modificados entre los borradores julio a octubre de 1984 como sucedería en el artículo 2.2 que volvían a evidenciar la *voluntad* del legislador⁵⁰⁰; puestos a dar facilidades se ampliaría también su duración de 2 a 3 años y por debajo de 3 a 6 meses. En el artículo 3.1 se señalaría como “la duración de estos contratos no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años”, y pudiéndose prorrogarse “automáticamente hasta dicho plazo máximo” –artículo 3.3–. Ello con una modificación de los proyectos iniciales, pues, si un principio habría de renovaciones “por períodos no inferiores a tres meses” en el texto final se hablaría de “períodos no inferiores a seis meses”, en lo que sin duda sería una pequeña victoria parcial de UGT⁵⁰¹. Lo que ya no convencería tanto a los empresarios y a la patronal, en un principio, sería la redacción del artículo 4:

⁴⁹⁹ Véase lo apuntado en su momento en el apartado “10.2.1. El momento de la toma de decisión política: la irrevocable necesidad de flexibilizar (marzo/mayo-agosto 1983)”.

⁵⁰⁰ En la redacción inicial –de julio de 1984– del artículo 2.2 se podía leer: «Los contratos y, en su caso, la prórroga o prórrogas que se acuerden, deberán formalizarse por escrito. En el modelo oficial de contrato que se establezca deberán constar necesariamente las circunstancias personales del trabajador, el carácter de la contratación y el tiempo de su vigencia». Justamente, se eliminarían todas las anteriores palabras desde el último punto, a la hora de la publicación en el BOE del RD 1989/1984. AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Anteproyecto de Real Decreto por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo. Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1984, sig. AI-14-02.

⁵⁰¹ AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Anteproyecto de Real Decreto por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo. Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1984, sig. AI-14-02 Una *victoria parcial* que Cerviño interpretaría de la siguiente forma en lo que constituye una de las explicaciones centrales de su tesis doctoral: «UGT terminó aceptando la contratación temporal por las razones expuestas. No obstante, utilizó su influencia en el gobierno para que la reforma laboral incluyera medidas que trataban de evitar el crecimiento de la temporalidad. Consiguió, por un lado, que la duración mínima del contrato temporal de fomento del empleo fuera de seis meses en todos los sectores productivos, eliminando la excepción hasta entonces vigente de permitir una duración

«A la terminación del contrato por expiración del plazo convenido, el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica equivalente a doce días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferior a un año»⁵⁰².

El resto de facilidades dadas por el RD 1989/1984 pero sobre todo la irrisoria cantidad a abonar en este último caso, no obstaculizarían su uso. Demasiadas eran las anteriores facilidades para desechar tan magnificadas oportunidades legislativas esbozadas. Como tampoco lo haría la redacción del punto 2 y 3 del artículo 5, de cara a evitar el temido efecto de *sustitución de fijos por temporales*, y más tras eliminarse el original punto 4.3⁵⁰³.

«5.2. Cuando los trabajadores hubieran estado vinculados a las mismas [empresas] por otro contrato temporal de esta naturaleza durante los doce meses inmediatamente anteriores, salvo que la duración de aquél hubiera sido inferior a tres años, en cuyo caso podrán realizar una nueva contratación hasta alcanzar el referido límite temporal.

5.3. Cuando se trata de cubrir el mismo puesto de trabajo que haya quedado vacante, dentro de los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de la nueva contratación de esta naturaleza, por la terminación de otro contrato temporal que hubiera agotado el plazo máximo de duración ilegalmente prevista».

Sin embargo, esta medida en principio protectora del trabajador apenas tuvo efecto alguno. Primero, por la falta de voluntad política real por parte de la Administración por llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de tales procesos de carácter ilícito. Y segundo, por la capacidad inventiva para-legal que demostrarían los empresarios en este mismo terreno. Ya que la sucesiva utilización de trabajadores temporales para cubrir un mismo puesto, en los periodos legales establecidos, fue la *regla precarizadora* comúnmente establecida como explicó Fernando Valdés Dal-Ré:

«La formulación flexible de esas restricciones no parece, sin embargo, que constituya ninguna amenaza al establecimiento de una plantilla inestable, formada básicamente por trabajadores temporales, pues al circunscribirse la prohibición de la contratación temporal encadenada de tipo objetivo a un mismo puesto de trabajo, dentro de 12 meses inmediatamente anteriores, basta disponer de un núcleo de trabajadores fijos y recurrir a las reglas de la movilidad funcional interna dentro de la empresa para conseguir una elasticidad en la estructuración de la plantilla que trasciende con holgura a lo requerido por las necesidades de ajuste»⁵⁰⁴.

Por tanto no es de extrañar que esta modalidad contractual, que implanta la temporalidad como la vía de acceso normal al trabajo –y que fracturará a medio-largo plazo el “principio de causalidad” –se transformara en la normativa más utilizada por los empresarios para contratar. Entre las posibles razones, por una muy sencilla ya que “permite a las empresas

inferior en el sector de la construcción y hostelería». CERVINO, Emma, *Políticas de representación...*, *op.cit.*, pp. 190-191.

⁵⁰² Aquí también se modificaría la redacción original: «3.4 A la terminación del contrato por expiración del plazo convenido, el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica equivalente a doce días por salario por año de servicio, o la parte proporcional que corresponda cuando la prestación de servicios hubiera sido inferior». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Anteproyecto de Real Decreto por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo. Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1984, sig. AI-14-02.

⁵⁰³ «4.3 Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales regulados en este Real Decreto celebrados en fraude de Ley». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Anteproyecto de Real Decreto por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo. Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1984, sig. AI-14-02.

⁵⁰⁴ VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Flexibilidad en el...”, *op.cit.*, p. 311.

un ajuste cuantitativo de trabajadores más rápido y eficaz»⁵⁰⁵. No terminarían ahí sus deseos como buscados beneficios, en tanto la contratación temporal por esta vía permitiría una,

«reducción drástica del coste salarial, utilización preferente de trabajo juvenil, mayor plasticidad en el uso de la fuerza de trabajo, aumento del poder de dirección y control empresarial, psicología del eventual, caracterizada por la sumisión, fragmentación y destrucción de la colectividad de trabajadores y vaciamiento del sindicato y de su poder de mediación ante la crisis»⁵⁰⁶.

Según datos del INEM de 1985 la preferencia de los empleadores muy pronto mostraría su “mayor sensibilidad” por esta vía: un 50% de las colocaciones se realizarían mediante los contratos temporales clásicos; 15% por la contratación temporal de fomento del empleo; y tan sólo un 5% firmaron contratos indefinidos. Estamos en los primeros momentos del *boom de la temporalidad*, que en pocos años afectaría a más de un tercio de la población. Y aunque no se puede afirmar a la *ligera* que tan solo con el RD 1989/1984 se diera origen a la “cultura de la temporalidad”, tal vía de contratación contribuiría, a su manera, eficazmente en la formación de tal fenómeno histórico-social.

Pero más allá de su uso o usos masivos, el Real Decreto 1989/1984 tendrá otras consecuencias de no poco alcance en términos estrictamente jurídicos. Pues a partir de su utilización masiva se cuestionarán no pocos pilares del Derecho del Trabajo, en una perspectiva progresiva de mayor inestabilidad, incertidumbre e inseguridad, sumada a una evidente degradación extrema de las condiciones laborales, que pronto habrá de atender la jurisprudencia⁵⁰⁷.

⁵⁰⁵ FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal...*, *op.cit.*, p. 120. En la misma línea se ha expresado Miguel Rodríguez-Piñero: «De hecho, se está creando con estos contratos temporales una vía más rápida, barata y menos conflictiva para los ajustes del personal, ya que estos contratos podrán ser utilizados para las necesidades normales de la organización productiva». RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “La contratación temporal en la Ley 32/1984 y en los decretos de desarrollo” en id. (coord.), *Comentarios a la nueva...*, *op.cit.*, p. 106.

⁵⁰⁶ CASA BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y...”, *op.cit.*, p. 331.

⁵⁰⁷ A partir del desarrollo, o mejor dicho de la *nueva configuración* que adquiere el Derecho del Trabajo a partir de esta misma reforma laboral, la jurisprudencia jugaría un papel clave hasta la siguiente oleada de reformas laborales. De esta forma, la jurisprudencia ha basado parte de sus fundamentos en la consolidación y confirmación de un conjunto de derechos constitucionales básicos como la libre sindicación o el derecho a huelga. Pero también ha tenido una enorme trascendencia su proceder en materia de normativa laboral. En este sentido, el trabajo desarrollado por el Tribunal Constitucional en lo relacionado con la tutela antidiscriminatoria, ha de destacarse. Todo ello, a partir de lo que se ha denominado como la *concepción contractualista-privatista de los derechos fundamentales*, que ha ido definiendo los contornos precisos del ejercicio efectivo del contrato de trabajo. De este modo, nos encontramos con una considerable labor judicial, que ha actuado como una especie de ‘instrumento equilibrador’ ante el aumento de la discrecionalidad empresarial al albur de la universalización de la contratación temporal. Así pues, «la defensa de los derechos constitucionales del trabajador y de su ejercicio efectivo, que corresponde efectuar al contrato de trabajo, estableciendo en dicha defensa un criterio de delimitación de la posición contractual de las partes, se ha visto corregida, en la jurisprudencia constitucional, por el derecho común de las obligaciones y contratos, fijándose su legitimidad en la conformidad con las reglas del derecho privado», tal y como explicaron en su momento, RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, VALDÉS DAL-RÉ, Fernando y CASAS BAAMONDE, M^a Emilia, “Diez años de...”, *op.cit.*, p. 8. En concreto, se ha de destacar el aporte de esta ‘jurisprudencia anti-discriminatoria’, en relación a lo relativo a la exclusión de los *outsiders* de los convenios colectivos, como efecto directo del proceso de precarización del SERL. De este modo, la labor realizada por el Tribunal Central de Trabajo (TCT), a través de su Sala 5^a de Conflictos Colectivos, ha consolidado una línea jurisprudencial que como señalarán M^a Emilia Casas, Antonio Baylos y Rafael Escudero, «asegura que la exclusión del ámbito de aplicación de un convenio colectivo de los trabajadores temporales, fijos discontinuos y a tiempo parcial vulnera el artículo 14 de la Constitución española, los Convenios 111 y 117 de la OIT y el artículo 17.1. del Estatuto de los Trabajadores». CASA BAAMONDE, M^a Emilia, BAYLOS, Antonio y ESCUDERO,

Así pues, y como afirmarán María Emilia Casas Baamonde y Fernando Valdés Dal-Ré, con tal figura,

«se produce, de este modo, un doble fenómeno de ‘destipificación del contrato de trabajo’ y de sus rasgos predominantes y hegemónicos y de ‘descomposición’ de los generales, inderogables y uniformes valores normativos de tutela del orden laboral [...]. Todo ello hace que el modelo de ocupación, antes dominante y monolítico, reste como ‘núcleo duro’ del mercado de trabajo y de la ‘universal’ regulación garantizadora de la clase trabajadora del ordenamiento laboral, disputado su espacio con fuerza creciente por las ‘nuevas formas de empleo’, que originan ‘tipos o subtipos distintos de contratos de trabajo’ así llamados ‘atípicos’»⁵⁰⁸⁵⁰⁹.

Ricardo, “Flexibilidad legislativa y..., *op.cit.*, p. 337. Todas estas medidas, terminarían siendo avaladas, a su vez, por el TC, remarcando el principio de igualdad entre *insiders* y *outsiders*, a la hora de la negociación de los convenios colectivos. El fundamento de las sentencias tanto las procedentes de las magistraturas como del mismo TC se han basado en negar la distinción entre trabajadores «sin otro fundamento que la temporalidad del vínculo de quienes resulten perjudicados. En definitiva, los tribunales refuerzan, con buen criterio, la funcionalidad del convenio colectivo, limitando, de alguna manera, su vaciamiento en beneficio absoluto de la autonomía individual y evitando una mayor precarización de las condiciones laborales de los trabajadores temporales». *Ibidem*. Véanse aquí, además, FERNÁNDEZ LÓPEZ, M^a. Fernanda, “La exclusión de los trabajadores temporales del ámbito de los convenios colectivos”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1988), pp. 389-407, y LÓPEZ LÓPEZ, Julia, “La contratación temporal y el fraude de ley”, *Relaciones Laborales*, vol. II, (1990), pp. 334-350; BAYLOS, Antonio, “Trabajo temporal y..., *op.cit.*, Para una visión global de la evolución de la jurisprudencia véase PRADOS DE REYES, Francisco Javier, “Contratos y relación de trabajo” en RODRÍGUEZ-SAÑUDO, Fermín y ELORZA GUERERO, Fernando (coords.), *Veinte años de jurisprudencia...*, *op.cit.*, pp. 72-262. Véase aquí lo también apuntado en la *nota* 475.

⁵⁰⁸ CASAS BAAMONDE, M^a Emilia y VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Diversidad y precariedad..., *op.cit.*, p. 241. Estos mismos autores advertirían de otra cuestión básica en relación con el abuso de la temporalidad, ya que se constituirá en un «filtro del principio de equiparación de derechos entre trabajadores atípicos y típico. El ordenamiento jurídico tiende a parificar el estatuto laboral de unos y otros en tanto en cuanto esa igualdad resulte conciliable con la situación de base de unos y otros en tanto en cuanto esa igualdad resulte conciliable con la situación de base propia de cada uno de ellos. De esta suerte, todos los derechos y garantías contractuales vinculados directa o mediatamente con la estabilidad en el empleo (protección frente al despido, complementos económicos de antigüedad, etc.) están ausentes del estatuto de los trabajadores atípicos». *Ibidem*, p. 255.

⁵⁰⁹ Al respecto, es de notable interés detenerse en un *informe* preparado por Benjamín Castro –líder de la UGT de Madrid– para la Comisión Ejecutiva de la UGT, después de la celebración de un seminario que llevaría por título: “Seminario sobre la reforma socialista de la legislación laboral”. En el citado documento, resumiría varia de las intervenciones que allí se llevarían a cabo. Destacando, de hecho, la ponencia de Segismundo Crespo –Subsecretario del Ministerio de Trabajo– con las siguientes palabras: «Justifica la modificación del la Ley ET como vía que permite una mejor adaptación de las necesidades de la empresa a una situación de crisis persistente, aunque esto suponga una desprotección de los derechos individuales de los trabajadores, cuestión esta que considera en algún caso como derechos ‘caducos’». Para a continuar realizar la siguiente valoración: «Confían excesivamente en que la iniciativa privada (a través de la inversión), va a tener una respuesta positiva a la simplificación contractual». AHFFLC, UGT, Unión Regional de Madrid, “Informe sobre *Seminario sobre la reforma socialista de la legislación laboral*. Salamanca 2 al 6 de junio de 1984”. Documento localizado dentro de la Secretaría de Acción Sindical, “Correspondencia remitida a J. L. Corcuera. Junio de 1984”. Sin embargo Álvaro Espina ha insistido en varios artículos en negar esta misma realidad, a partir del discurso de la *necesidad irrevocable de la flexibilidad*, y negando que por esta misma vía pudieran darse una reducción de derechos laborales: «La flexibilidad ha afectado a la ampliación de plazos y posibilidades de uso y a la agilización de trámites. Con ello se pretendía despejar el terreno para que las empresas no esperasen a la consolidación de la expansión económica para proceder a ampliar las plantillas, sino que funcionasen en cada momento con el mayor volumen de empleo y cobertura de vacantes posibles. No por ello se redujeron las garantías jurídicas ni los derechos laborales de los trabajadores contratados bajo modalidades temporales, y se fijó también una indemnización mínima de doce días de salario por año de servicio a la terminación de los contratos temporales de fomento de empleo». ESPINA, Álvaro, *Empleo, democracia y...*, *op.cit.*, p. 489.

La segunda figura clave de cara a entender el *salto delante* que supondrá en su conjunto la RET'84, sería la aprobación del tantas veces citado RD 2104/1984. En las siguientes líneas se comprenderán las fundamentadas sospechas que la UGT tendría siempre al respecto de tal figura, que se transformaría en otro de los *caballos de Troya* de la expansión sin límites de la temporalidad y, por ende, de la precariedad laboral. No se equivocaron en dicho caso, más aún cuando evidenciaron como el original artículo 5.3 desaparecería en una clara maniobra desde Trabajo por *fomentar* dicha figura. De esta forma, con la introducción de este nuevo tipo de contrato se añadiría una “una causa justa adicional de contratación temporal”, no prevista en ninguna de las legislaciones anteriores⁵¹⁰.

El encaje en este caso dentro de la Ley 32/1984 se justificaría con el fin de aunar en una misma normativa todos los supuestos de duración determinada del contrato de trabajo, en base al “desarrollo reglamentario del artículo 15” que no estuvieran recogidos en su punto 1. Así se contemplaba dentro de esta *categoría* el contrato *para realización de una obra o servicios determinados*, el contrato *para atender circunstancias del mercado* y el contrato *por lanzamiento de una nueva actividad*, junto con una figura en la que no entraremos –el contrato *para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo*–.

De esta forma, nos hallamos ante una serie de figuras de la contratación temporal “clásica”, aunque desaparecerá, nuevamente, el principio de causalidad en otro claro ejemplo de expansión sin límites de la *flexibilización*. Veamos. En la primera figura contemplada, los *contratos para obra o servicios determinados* se establecerán a partir del artículo 2. Así se podía leer: “Estos contratos tienen por objeto la realización de obras o servicios determinados con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la Empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta”. Por más que se afirmara en el punto 2a) que se tendría que “especificarse con precisión y claridad el carácter de la contratación”, el siguiente punto a su vez decía como la “duración de los contratos será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio”. A saber, no se establecería ningún límite máximo ni mínimo. Más aún pues en el punto 2c se introduciría una *coletilla* harto importante que ya hemos visto previamente: pues en caso de “denuncia de alguna de partidas del mismo” y si siguiera continuando la realización de la “prestación laboral, el contrato se considerará por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación”. Por otra parte, el incremento de la capacidad discrecional del empresario está fuera de toda duda, a partir de ese mismo instante, permitiéndole con esta figura un *uso y disfrute* sin limitación alguna.

En relación a los *contratos por eventuales por circunstancias de la producción* – artículo 3– el esquema, en cierta parte, se repite. Se abre una nueva vía de contratación temporal, en donde el empresario ya no tiene que demostrar ningún tipo de obra o servicio determinado, sino solamente alegar que se realizaría la debida contratación para “atender las exigencias circunstancias del mercado, acumulación de tareas o excesos de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de la Empresa”⁵¹¹. Por tanto se trata de un *menú a la carta*, con el ligero “inconveniente” que se introduce en el punto 3.2: “La duración máxima de estos contratos será de seis meses dentro de un período de doce meses”. Pero si llegado el caso se agotara el plazo máximo, con o sin prórroga de por medio, y pese a que no fuera denunciado y

⁵¹⁰ MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la..., op.cit.*, p. 31.

⁵¹¹ En la redacción del pre-proyecto de 1984 se podía leer: «Serán contratos eventuales los que se concierten para atender las necesidades derivadas de los incrementos que eventualmente se produzcan en el volumen de actividad de las empresa, incluso de la actividad normal, por circunstancias del mercado, acumulación de tarea o exceso de pedidos». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Anteproyecto de Real Decreto, sobre duración de contrato de trabajo. Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1984, sig. AI-14-02.

se entendiera por tiempo indefinido desde ese momento, el legislador volvería a introducir la *coletilla* que acabamos de ver: “salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación”.

Ahora bien, si las anteriores figuras son harto generosas abriendo un amplio conjunto de posibilidades al empleador, más lo sería la de los *contratos por lanzamiento de nueva actividad* establecida en su artículo 5. Téngase presente que sobre esta misma figura se desatarían no pocos de los debates antes y después de la reforma del mercado de trabajo de 1983, como en vísperas de su aprobación del RD correspondiente por un Consejo de Ministros el día 21 de noviembre. De hecho, lo que no faltarían serían las numerosas redacciones alternativas sobre el texto original entregado en julio de 1984⁵¹².

«5.1. Podrán celebrarse contratos de trabajo de duración determinada en los casos de las Empresas de nuevo establecimiento o de aquellas ya existentes que amplíen sus actividad como consecuencia del lanzamiento de una nueva línea de producción, un nuevo producto o servicio o de la apertura de un nuevo centro de trabajo. El periodo de lanzamiento no podrá exceder de tres años en ningún caso».

Las anteriores formas contractuales, asimismo, tendrán todo un conjunto de *disposiciones comunes* de no poco alcance⁵¹³. Además de una flexibilización evidente en relación al *período de prueba*, en el artículo 9 sobre las indemnizaciones se señalaría literalmente lo siguiente:

«En los contratos regulados en el presente Real Decreto no procederá indemnización por terminación, salvo norma o pacto colectivo o individual que se establezca».

Centrándonos ya exclusivamente, en esta última figura, más allá de las óptimas ventajas ofrecidas al empresario, no estaba ahí el principal foco de discusión en tanto éste giraría en torno a qué entender y/o interpretar por *lanzamiento de nueva actividad*. ¿Por qué? Primero, estamos ante un término ambiguo donde los haya y de dudosa interpretación jurídica. Junto con las justificaciones oficiales u oficiosas⁵¹⁴, esta figura se transformaría en uno de los más

⁵¹² «5.1. Pueden celebrar contratos de trabajo de duración determinada las empresas de nuevo establecimiento y las ya existentes que amplíen sus actividades como consecuencia del lanzamiento de una nueva línea de producción, un nuevo producto o servicio. El período de lanzamiento, en ningún caso podrá exceder de tres años». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Anteproyecto de Real Decreto, sobre duración de contrato de trabajo. Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1984, sig. AI-14-02.

⁵¹³ Se ha de destacar aquí también como en lo referente al artículo 5.2c, la UGT sería capaz de introducir una modificación sustancial, a la hora de obligar a que la renovación del tal tipo de contrato fuera por un periodo mínimo seis meses a diferencia de los tres meses inicialmente planteados. Ahora bien, con las mismas se modificaría la versión original en un aspecto de cierta importancia. Así en el artículo 6 referido a la *Forma de los contratos*, mientras que en el texto del verano de 1984 se podía leer: «Los contratos de trabajo de duración determinada regulados en los artículos 2 y 3 del presente Real Decreto deberán instrumentarse por escrito cuando su duración sea superior a cuatro semanas». Ya en la redacción final del artículo 6.1 del RD 2104/1984 se señalaba: «Los contratos de interinidad y por lanzamiento de nueva actividad deberán instrumentarse, en todo caso, por escrito y en último supuesto, en el modelo oficial que figura en el anexo al presente Real Decreto». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Anteproyecto de Real Decreto, sobre duración de contrato de trabajo. Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1984, sig. AI-14-02, y Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre, *por el que se regulan diversos contratos de trabajo de duración determinada y el contrato de trabajadores fijos discontinuos*.

⁵¹⁴ La justificación dada al respecto por el mismo Secretario General de Empleo, Álvaro Espina, estuvo en la *necesidad* de reducir los obstáculos a los nuevos empresarios: «Pero además, las nuevas medidas se hallaban también al alcance de las empresas instaladas, que podían utilizarlas para la expansión y renovación de sus actividades. Y tampoco cabe duda de que estas empresas contaban también con una mejor posición de partida para hacerlo que las nuevas iniciativas, surgidas en su mayoría

empleados mecanismos para que los empleadores pudieran “ajustar realmente su plantilla a su concepción inicial, fijando a cada trabajador el tiempo de permanencia en la empresa que, según sus estudios previos realizados, demanda la tarea o quehacer, que según su oficio y categoría profesional, se le asigne”⁵¹⁵.

Dentro de los especialistas del Derecho del Trabajo surgiría un agrio debate en su día. Por un lado, estarían quienes plantearían como Antonio Martín Valverde que pese a que suponía un “paso más en la liberalización de la contratación laboral” en lo básico no modifica ni altera las estructuras normativas de las modalidades de contrato de trabajo temporal al necesitar una causa⁵¹⁶. Por el contrario expertos como Miguel Rodríguez-Piñero, argumentarían como se estaba ante una forma contractual que además de producir un paso adelante en la liberalización de la temporalidad, fomentaría indiscriminadamente la discrecionalidad empresarial⁵¹⁷.

¿Qué significa realmente la expresión del *lanzamiento por nueva actividad*? Estamos ante una pregunta de muy difícil solución y en donde los consensos escasearon en su momento como acabamos de ver. En principio se trataría, según la exposición de motivos del RD, de la aparición de una nueva actividad empresarial, es decir la aparición de un nuevo centro de trabajo, que necesitaría *nuevos* trabajadores temporales, para cubrir en un plazo máximo de 3 años, los primeros momentos de la actividad. Pero esta misma lectura del RD, al mismo tiempo, puede inducir a pensar en otra dirección. En tanto no necesariamente tendría que ser una nueva empresa, sino que esta *nueva actividad* recaería en una simple ampliación de actividades del nuevo centro o en un cambio de la línea de producción. A partir de lo cual las posibilidades de interpretación aumentan ilimitadamente la discrecionalidad empresarial para la utilización del contrato temporal. Tal como ha señalado el propio Rodríguez-Piñero, es necesario diferenciar el sentido cuantitativo del cualitativo, y analizar la intención del legislador:

«El Decreto 2104/1984 ha tratado, sin embargo, de ampliar el propio concepto de nueva actividad dando una interpretación extensiva al término, posiblemente sobrepasando al propio sentido de la ley, o al menos, la intención del legislador. Colocándose en esta óptica de facilitación de la creación de empleo, el Reglamento pone el acento no tanto en el elemento

de los empresarios primerizos. Es evidente que las dificultades inherentes a la nueva instalación encontraban en las nuevas medidas un paliativo, que podía contribuir a hacer aparecer nuevos empresarios». ESPINA, Álvaro, *Empleo, democracia y...*, op.cit., p. 209.

⁵¹⁵ MUÑOZ CAMPOS, Juan, “Los contratos temporales en el reformado Estatuto de los Trabajadores”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1985), p. 108.

⁵¹⁶ MARTÍN VALVERDE, Antonio, “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la...*, op.cit., p. 34. Sobre esta figura contractual el propio autor ha señalado que: «La temporalidad del contrato continúa necesitando el apoyo de una causa justificada referente a necesidades objetivas de la organización de trabajo concreta en que van a prestarse servicios. Porque lo que pretende el legislador al introducir esta nueva causa de contratación temporal no es (ni probablemente pueda ser) un favorecimiento indiscriminado de las empresas o actividades nuevas en relación con las antiguas sino una consideración de los riesgos especiales que concurren en aquellas por la carencia de elementos de juicio suficientes sobre su rentabilidad y / o sobre sus requerimientos de mano de obra. La ‘ratio legis’ de esta reforma normativa es, así pues, atribuir una mayor elasticidad a la plantilla de las empresas o actividades de nuevo ‘lanzamiento’, en correspondencia con el carácter experimental de sus gestiones o tareas iniciales». *Ibidem*.

⁵¹⁷ RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “La contratación temporal en la Ley 32/1984 y en los decretos de desarrollo” en id. (coord.), *Comentarios a la nueva...*, op.cit., p. 97. Para el autor la clave del asunto radical en como la nueva normativa ya no pone el acento en la *incertidumbre* empresarial sino en la *novedad*, con la introducción de una gran incertidumbre para el trabajador. Al respecto véanse otras opiniones como la de, DURÁN LÓPEZ, Federico, “«Lanzamiento de nuevas actividades» y contratación temporal”, *Documentación Laboral*, nº 13, (1985), pp. 29-44.

cualitativo de la novedad, sino en el aspecto cuantitativo de la ‘ampliación’ de actividades, aunque unida a un elemento cualitativo que puede ser diverso»⁵¹⁸.

El objetivo marcado inicialmente para la introducción de esta forma contractual temporal se basaría, una vez más, en asegurar y potenciar las potencialidades de los empleadores, a través de dos justificaciones. Primero, la necesidad de disminuir los riesgos que corren las nuevas inversiones y asegurar su futura consolidación. El segundo argumento –falso en su planteamiento– con el que se justificaría tal RD, se encontraría en la necesidad de homologación de la legislación comunitaria⁵¹⁹.

Pero he aquí nos hallamos ante un debate de todavía mayor alcance, cuando dejamos apartadas las intenciones y justificaciones gubernamentales. En tanto, no sólo se va a eliminar de un *solo plumazo* el principio de la causalidad sin mayores contratiempos, sino que se va legitimar e institucionalizar por esta vía un nuevo principio rector en relación a la *nueva dependencia* del Derecho del Trabajo con los propios intereses empresariales.

«La fijación previa de la temporalidad del contrato no se justifica aquí por la propia, y previamente conocida, temporalidad de la necesidad del trabajador, derivada de la propia naturaleza temporal de la tarea a realizar por éste (o de la sustitución temporal de otro trabajador), sino por el interés empresarial, que la ley estima legítimo, de que la colaboración del trabajador no sea permanente se conecta así a una falta de seguridad, al desconocimiento, a la falta de certidumbre de la continuidad de la actividad a la que la prestación de ese trabajador se va a dedicar»⁵²⁰.

Como puede deducirse de lo hasta ahora descrito, la voluntad político-laboral de los ejecutivos socialistas sería unívoca al respecto. Bien por la vía ordinaria –artículo 15– bien por

⁵¹⁸ RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “La contratación temporal en la Ley 32/1984 y en los decretos de desarrollo” en id. (coord.), *Comentarios a la nueva...*, op.cit., p. 100. El mismo autor se decanta por «la labor jurisprudencial habrá de realizar una no fácil tarea interpretativa. Dado que la norma reglamentaria se ha sobrepasado en la interpretación del término legal, no cabe duda que la jurisprudencia habrá de interpretar con cierto rigor el concepto de ‘nueva línea de producción’, exigiendo no sólo el requisito de ampliación de actividades, sino además la existencia de elementos innovadores que permita hablar de ‘nueva línea de producción’, en el sentido empresarial y comercial del término, que afecta no sólo a la innovación en los procesos sino también a los propios productos resultantes». Ibídem, p. 101. Para el que fuera Magistrado del Tribunal Supremo –asesinado por ETA en 1997– Rafael Martínez Emperador, insistiría al respecto de cómo tal figura tan sólo se podía emplear a través de las dos siguientes vías: a) Proyección en el futuro de la nueva actividad; b) Contenido de la nueva actividad. MARTÍNEZ EMPERADOR, Rafael, “El contrato temporal por lanzamiento de nueva actividad”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1985), pp. 121-125. Complementéase las anteriores visiones con la valoración de, GARCÍA PIQUERAS, Manuel, “El Contrato para lanzamiento de nueva actividad” en *Los contratos temporales...*, op.cit., pp. 147-162.

⁵¹⁹ Tal como ha señalado Raquel Aguilera, la propuesta de homologación comunitaria estaba inspirada en «una proposición de Directiva comunitaria de 4 de abril de 1982 que prevé un supuesto de lanzamiento de nueva actividad de duración incierta. Tal Directiva, sin embargo no llegó a aprobarse». AGUILERA IZQUIERDO, Raquel, “El principio de...”, op.cit., p. 104. Un argumento, por cierto, con la que en su día UGT justificaría la aceptación de tal medida. De hecho, en el ya varias veces citado *informe interno* de la UGT de noviembre de 1983, se diría exactamente lo siguiente: «Se trata de una figura contractual hasta ahora no regulada en España y sus principales características son: Está establecida en la Directiva del Consejo de las CCEE, presentada por la Comisión el 7 de mayo de 1982. Esta Directiva entrará en vigor en 1984». Y asimismo se daría por válida la *definición propuesta* por Trabajo, cuando afirmaría: «El establecimiento de una nueva empresa, de una nueva línea de producción, o el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. En ningún caso quedarán comprendidas bajo este supuesto las anteriores situaciones cuando se trate de una mera continuación de actividades anteriores que se extingan, ni cuando los requerimientos laborales necesarios para realizarlas puedan cubrirse con trabajadores ya contratados». AHHFLC, UGT, Secretaría de Acción Institucional, “Aspectos fundamentales del principio de acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Materia de contratación”, noviembre de 1983? sig. AI-195-05.

⁵²⁰ RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “La contratación temporal en la Ley 32/1984 y en los decretos de desarrollo” en id. (coord.), *Comentarios a la nueva...*, op.cit., p. 97.

la vía excepcional –artículo 17.3– se procedería a una generalización de la contratación temporal, sin mayores limitaciones jurídicas, porcentuales, y tan sólo en el caso concreto del RD 1989/1984 con doce días indemnización como máximo. A lo anterior se añadiría otra vía complementaria: la de la *subvención* con especial atención a los jóvenes. Lejos aún de tratarse de una *verdadera* política de empleo juvenil, se continuaría con la política previa desde los tiempos de UCD, con la salvedad de incrementar la subvención, sumada al incremento flexibilizador en el uso de los *contratos en prácticas y para la formación*.

En este sentido, se ha de encuadrar el RD 1992/1984 en relación a la nueva redacción del artículo 11 de la Ley 32/1984. El nuevo contrato en prácticas se establecería ahora sin límites de edad, y destinado a aquellos trabajadores que “dentro de los cuatro años inmediatamente siguientes a la finalización de sus estudios necesarios para la titulación” – artículo 2.1–. Con un tiempo mínimo de tres meses y un máximo de tres años –artículo 3.1– tampoco se establecería obligatoriedad alguna en relación al periodo de prueba –artículo 3.2–. Y todo ello por y a través de una retribución considerablemente baja según se establecía en el artículo 4.

«La retribución del trabajador en prácticas será la establecida en el contrato o, en su caso, en Convenio Colectivo, sin que, en su defecto pueda ser inferior a la base mínima de cotización vigente en cada momento correspondiente a la categoría profesional, todo ello en proporción a la duración de la jornada pactada en el contrato».

En suma, se podía llegar a dar casos, por ejemplo, que si el joven titulado tan sólo trabajaba *efectivamente* el 50% de una jornada laboral, cobraría tan sólo 20 horas semanales a partir de la base mínima de cotización, lo que, sin duda, constituiría un salario bajo. Pero a abaratar todavía más esta mano de obra, vendría el artículo 5.

«Las empresas que contraten a tiempo completo a trabajadores para la realización de prácticas laborales tendrán derecho a la reducción, durante la duración del contrato del 75 por 100 de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a las contingencias comunes por trabajadores contratos según los artículos anteriores».

Otro tanto sucedería en el caso de los *contratos para la formación*. Destinados, en términos generales, a jóvenes entre 16 y menos de 20 años –artículo 7.1, produciéndose aquí una ampliación en este mismo ámbito, en tanto en la anterior normativa era a partir de los 18 años– además se reduciría la parte dedicada a la enseñanza que pasa a estar representada por un 1/5 del tiempo total, mientras que en la anterior legislación se destinaba un mínimo del 1/3 y un máximo del 2/3 –artículo 8.2–. Un contrato *para la formación* con una duración igual a los de *prácticas*, pero donde todavía el empleador podía abaratar más la ya por sí barata mano de obra –valga la redundancia en este caso–. Primero, en el artículo 9 se señalaba:

«La retribución del trabajador, que corresponderá únicamente a las horas efectivamente trabajadas, será la establecida en el contrato o, en su caso, en el Convenio Colectivo correspondiente, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional que corresponda en proporción a la jornada de trabajo efectivo».

Para a continuación, y en segundo lugar, proceder a la desgravación completa de las “cuota empresarial de la Seguridad Social, correspondiente a las contingencias comunes, por trabajador contratado, siempre que la plantilla de la Empresa esté formada por menos de 25 trabajadores”. Pero si tal caso sucedía, según el mismo artículo 11, “se reducirá la señalada cuota empresarial, por trabajador contratado en el 90 por 100”.

En esta primigenia versión de los que en el futuro se denominarán como los *contratos basura*, también se contemplaba en su artículo 17, en donde tras afirmar como tales trabajadores “tendrán derecho a todas las prestaciones de Seguridad Social”, en cambio, no computarían su contrato “efectos de carencia para la pensión de jubilación”. Un artículo que no figuraba en el proyecto de julio de 1984. Asimismo en la redacción final se eliminaría un inicial

artículo 14.2 destinado, en principio, a evitar el uso fraudulento de esta figura⁵²¹ así como se introduciría en el artículo 13, la *coletilla* final, “salvo que se acuerdo expresamente lo contrario”, al referirse en esto caso, a la posible interrupción en el “cómputo de la duración del contrato”, por diversas circunstancias. Sumado también a una última *coletilla* en relación al artículo 15 relativo a la posibilidad de adquirir la “condición de trabajadores fijos”, y que ya hemos visto en más de un caso: “salvo que de la propia naturaleza de la actividad o servicios prestados se deduzca claramente la duración temporal de los mismos”.

Estas dos vías de contratación juvenil serán empleadas, de forma aguda, en los momentos de recuperación económica. Y en términos generales, las mismas terminarán vinculadas a conocidos y extendidos usos fraudulentos, al ser utilizadas como simples contratos temporales –en tanto la cuestión de la formación prácticamente desaparecería en la práctica– y además, a su manera, bonificados. Pero sobre todo constituirían un poderoso instrumento de selección de personal al empleador.

Tal y como hemos advertido, la *generosidad* de la Administración socialista no conocería límites cuando de lo que se trataba era de contratar a jóvenes y otros colectivos excluidos del mercado laboral. Aunque cabría citar otros tantos programas y formas contractuales –por ejemplo los contenidos en el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, *por el que se regulan el contrato a tiempo parcial, el contrato de relevo y la jubilación parcial*– en general tendría un muy escaso uso, por múltiples circunstancias que se escapan de los objetivos de esta investigación.

Por ir cerrando este breve como ajustado repaso por las bases históricas y en concreto jurídico-técnicas de la formación histórica de la “cultura empresarial de la precariedad”, una de las más celebradas –como discutidas– aportaciones a la *causa* de la flexibilización y de liberalización del SERL a lo largo de la “década del cambio”, por parte de los socialistas sería la aprobación del Real Decreto 799/1985. Una normativa –como hemos tenido tiempo de ver– que generaría más de un disgusto y enfado dentro de la familia socialista. De hecho, constituye la última contribución de los Ejecutivos socialistas en esta línea de actuación, hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 1/1992. Quizás la lectura de la última parte de su larga *Exposición de Motivos*, tras un amplio desglose de todas las normativas aprobadas desde la Ley 32/1984, pueda resultar más o tanto ilustrativa de cuantas explicaciones e interpretaciones se pudieran ofrecer:

«No existía hasta ahora, sin embargo, una medida de fomento para facilitar la contratación indefinida del colectivo que se ve afectado con mayor intensidad por la situación de desempleo, cual es el caso de los jóvenes. Es conveniente realizar el mayor esfuerzo para corregir esta situación, bonificando sustancialmente las aportaciones empresariales a la Seguridad Social por los trabajadores jóvenes contratados para empleos estables. Ya que el nivel actual de estas cotizaciones generalmente considerado como uno de los factores que disuaden a las empresas de hacer un mayor uso del trabajo de este mismo colectivo.

El importante esfuerzo presupuestario que esta medida supone, aconseja reservar su aplicación para aquellas empresas que realizan a su vez esfuerzos apreciables de mantenimiento del empleo.

Al mismo tiempo es conveniente otorgar la misma bonificación que ahora se establece para los jóvenes, a los colectivos que tenían bonificaciones limitadas en el tiempo, con el fin de igualar la situación de los colectivos que encuentren similares dificultades de acceso al empleo estable.

De esta manera se completa el cuadro de medidas de política de empleo que, en conjunción con las futuras medidas sobre la formación e inserción profesional, también previstas

⁵²¹ En concreto se señalaba: «Los contratos regulados en los artículos anteriores, se extinguirán automáticamente, en caso de no prorrogarse, por expiración del tiempo convenido, no pudiéndose celebrar otro contrato de igual naturaleza con el mismo trabajador». AHFFLC, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Anteproyecto de Real Decreto, por el que se regula la contratación en prácticas y para la formación. Borradores de anteproyectos de Real Decreto que desarrollan distintos artículos del Estatuto de los Trabajadores”, Madrid, 1983, sig. AI-14-02.

por el AES, permitirá disponer de los instrumentos fundamentales para practicar una política activa de la mano de obra de carácter integral».

¿Ausencia de medidas? ¿De bonificaciones? ¿De ayudas? Lo cierto, es que tal Real Decreto tendría, por fin, otros objetivos no declarados como ahora examinaremos. Pero antes téngase en cuenta como se volvía a *tirar* del artículo 17.3 del ET, e inclusive, en esta ocasión, del artículo 10 de la LBE. Así en el artículo 1 se dispondría:

«Las empresas que contraten por tiempo indefinido y a jornada completa, a jóvenes desempleados menores de veintiséis años, u opten a la finalización de un contrato en prácticas y para la formación para su conversión en un contrato de aquella naturaleza, cotizaran por tales trabajadores, por contingencias comunes al Régimen General de la Seguridad Social, aplicando como aportación empresarial el porcentaje del 12 por 100, durante toda la vigencia del contrato».

O lo que es lo mismo se rebajaría de un solo *golpe* el 50% la por sí ya rebajada cuota empresarial al respecto. Todo ello, sin mayores condiciones u obstáculos. Asimismo se extendería su uso a los mayores de cuarenta y cinco años, a través de una nueva redacción del artículo 1.1b del RD 3239/1983 así como a los contratados a tiempo parcial, a los afectados por un contrato de relevo como a los trabajadores en situación de jubilación parcial, establecidos en el artículo 10 del RD 1991/1984.

Ya en su Disposición Transitoria Tercera se establecería una vigencia de “treinta y seis meses”. Es decir, a lo sumo tales contratos tendrían una duración del tres años, lo que no era poco, en cualquier caso, teniendo presente que en estos años la inestabilidad temporal en un mismo puesto de trabajo se incrementaría. Como se examinado en el apartado 7.2 a su conclusión no serían pocas las presiones de la patronal de cara a la continuidad de tal RD, a lo que se sumaría la oposición radical por parte de UGT⁵²².

Pero lo que no se puede obviar, de ninguna forma, es que esta figura llegaría en el momento previo del posterior *boom económico*, lo que aseguraría a los empleadores una contratación subvencionada en un plazo de tres años. Así pues, y bajo la apariencia de una contratación indefinida, se estaba en una situación de temporalidad a tres años vista como máximo. De esta forma, tan sólo en 1987 se firmarían 119.999 contratos de este tipo⁵²³.

Quedan así establecidos los principales dispositivos legislativo-laborales que implicaría la Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984, junto con su propio desarrollo legislativo. No es posible ni aconsejable comparar los mismos con la realidad del presente vivido. Nos movemos en otro tiempo histórico, en donde todavía se mantendría ciertas cautelas en relación al mecanismo de salida como en lo referido a la flexibilidad interna. Ahora bien, como indicó el sociólogo Martín Criado, se trató, en definitiva, de una auténtica *revolución liberal* del SERL en su conjunto⁵²⁴. Más aún, pues, en términos históricos constituyó el *gran salto adelante* tras que el que vendría el nacimiento de la “cultura de la temporalidad”.

Pero más allá de este conjunto de evidencias, y teniendo presente todo lo que se ha venido planteando a lo largo del II como III Epígrafe, por último cabe preguntarse bajo la óptica aquí ensayada, si, primero, el surgimiento de la “cultura de la temporalidad”, y segundo, la consolidación, de la “cultura empresarial de la precariedad”, ¿constituían una *consecuencia*

⁵²² Véase Capítulo 7, *nota 545*, entre otras.

⁵²³ No obstante como ha señalado Ignacio Flórez, los empresarios preferirán ante tal abanico de posibilidades las figuras contractuales más flexibles, que aquellas que tienen incentivación económica: «Se deduce que en la segunda mitad de la década de los ochenta se utilizan más las que no tienen incentivación económica y son en sí mismas medidas más flexibles. Me refiero al contrato temporal como medida de fomento del empleo y a la contratación a tiempo parcial frente a las incentivadas como el contrato en prácticas, el contrato para la formación y el empleo comunitario productivo de los convenios entre el INEM-otros Organismos Públicos». FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal...*, *op.cit.*, p. 127. Una visión compartida también por, GARCÍA PIQUERAS, Manuel, “El Real Decreto 799/85 de 25 de mayo” en *Los contratos temporales...*, *op.cit.*, 395-403.

⁵²⁴ MARTÍN CRIADO, Enrique, *Producir la juventud...*, *op.cit.*.

querida del modelo de flexibilidad diseñado por el primer Gobierno socialista? O, más sencillamente, ¿formaba parte de las *condiciones necesarias* del proyecto de modernización socialista? Y tal y como hemos venido defendiendo, en concreto cuando se ha examinado tal repertorio legislativo, la respuesta es afirmativa.

De hecho, en el terreno de sus *efectos queridos* no se puede desatender una de sus dimensiones claves, y que conecta con las tesis planteadas en la *Presentación*. Nos referimos a las múltiples consecuencias que tendrá la RET'84 en la alteración sustancial del modelo de *reproducción de los grupos o clases sociales*, tanto a la hora de acceder, permanecer como de salir del mercado de trabajo. Una alteración de los mecanismos de reproducción social que se concentraría con fuerza en las nuevas como numerosas cohortes de jóvenes, que accederán en estos años al mercado laboral. Y ello con tres poderosas evidencias: primero, en momento alguno se solucionaría el problema del desempleo, en especial el juvenil. Segundo, se desestructuran los ciclos vitales-laborales de dos generaciones enteras de trabajadores, con el efecto *ah hoc*, de la ruptura de la cohesión interna de la clase trabajadora, lo que afectara, a su vez, a la capacidad de movilización del movimiento obrero. Y, en tercer lugar, tras estos fenómenos se encuentra una de las claves de la propia *fractura generacional* de la que hablara en su momento el propio James Petras.

De esta forma, la reforma ensayada y puesta en marcha durante la primera legislatura socialista, tendrá un tremendo *sobrecoste* en términos negativos para las funciones propias del Derecho del Trabajo, una vez que se válida y se da carta de naturaleza a la *filosofía de la flexibilidad*. Pues como indicaron María Emilia Casas y Fernando Valdés Dal-Ré:

«el Derecho del Trabajo ha dejado de ser un ordenamiento compacto e imperativo para convertirse en un sistema jurídico internamente fracturado y rebajado y desigual en el cumplimiento de su cometido tutelar. Su tradicional función mediadora de intereses antagónicos ha virado, en el curso de la crisis económica y del modelo de empresa y de trabajador industrial, hacia una atención más desvelada o nítida de las necesidades empresariales y de la economía de mercado, progresivamente terciarizada y diferentemente concentrada»⁵²⁵.

Junto a la propia *crisis institucional* del Derecho del Trabajo, habría que sumarle, entre otras muchas posibles consecuencias la alteración de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, lo que, a su vez, daría lugar a lo que el Colectivo IOE denominara como el *apartheid laboral* “en el que conviven –alejados de los sectores sociales dominantes– trabajadores asalariados estables (tradicionales) junto a sectores que vienen en la inestabilidad laboral, alternando subempleos y paro prolongado”⁵²⁶.

Llegamos aquí a nuestro punto y final. O si se prefiere regresamos a nuestros puntos de partida originales que nos marcáramos en la *Presentación* y en el Apartado 2.1. *Nuestros caminos de aproximación: interrogantes e hipótesis de trabajo*. A saber: el examen de las bases político-institucionales pero también legislativas, que se encuentran detrás de la formación histórica de la “cultura empresarial de la precariedad”.

No ha sido sencillo concretar, explicar e interpretar las dimensiones de estas mismas *bases históricas*, tal y como se ha advertido en numerosas ocasiones. La sola reconstrucción de todos los hechos y acontecimientos históricos que se han ido entrelazando, de forma paciente y detenida, en el Epígrafe IV. *Historia de una reforma laboral*, al menos, deja asentados los cimientos para que futuras investigaciones puedan, en su día, complementar esta vibrante y apasionada historia.

Así pues, hasta aquí también llega nuestro estudio de caso. Un estudio de caso bastante *atípico* dentro de la historiografía contemporánea, en tanto lo que se ha propuesto ha sido el

⁵²⁵ CASAS BAAMONDE, Mª Emilia y VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Diversidad y precariedad...”, *op.cit.*, pp. 256-257.

⁵²⁶ COLECTIVO IOE, “Los jóvenes ante...”, *op.cit.*, p. 199.

historiar y analizar la legislación laboral, que conduciría, por un lado, al nacimiento y extensión de la *cultura de la temporalidad*, sumado a su prolongación histórica, es decir, al surgimiento de la *cultura empresarial de la precariedad*. Dos fenómenos históricos que se hayan, tras la metamorfosis de nuestro mercado de trabajo, y que se han de relacionar, de forma obligada, con las dinámicas del proyecto de modernización socialista.

En su momento, en concreto a lo largo del Epígrafe *III. Los ejecutivos socialistas y la reestructuración del modelo capitalista español (1982-1992)*, se dio buena cuenta de los principales resultados macroeconómicos de tal época de cambio socioeconómico, y en donde el peso de la transformación de las relaciones capital-trabajo quedó también constatado. De esta forma, queda pendiente para un futuro próximo, abordar, de forma detenida y monográfica, como sería empleada la RET'84, junto con su desarrollo legislativo, por parte del cuerpo empresarial. Una tarea no menor, en ningún caso, pero que su sólo planteo desborda los límites de esta tesis doctoral así como sus principales objetivos.

13. Conclusiones

«El utópico, como el veraz y el bondadoso, está indicando siempre a los otros, con su comportamiento, la dirección en la que convendría moverse. Puede ocurrir, y de hecho ocurre en ocasiones, que el utópico, como el veraz y el bondadoso, se equivoque de medio a medio en su estar en el mundo, en este mundo; pero incluso cuando yerra sobre el presente, el utópico, como el bondadoso y el veraz, obliga a torcer la mirada de los que le miran, no sobre su rostro (porque el utópico no suele ser narcisista ni autista) sino en la dirección más conveniente para la mayoría. No digo más conveniente para *todos* porque eso, en el mundo social dividido en clases, tiene que ser considerado como un imposible ontológico».

Francisco FERNÁNDEZ BUEY, *Utopía e ilusiones naturales*.

«En algunos estratos de la sociedad se encuentran todavía algunos progresistas. Se les distingue porque maldicen del progreso; adoptan la posición que fue de los religiosos, de los conservadores, que temían ver pervertido lo natural, entendiendo por natural el conjunto de circunstancias que les permitían disfrutar del poder».

Eduardo HARO TECLEN, “Progresistas”, *El País*, 29 de agosto de 1987.

«Que González fuera por lo libre tampoco era problema para los adictos. Al fin y al cabo, en este país tan variopintamente anarquista, si Fraga encabeza el anarcofraguismo de centro derecha, ¿por qué González no podía encabezar el anarcofelipismo de extremo centro? Los anarquistas que proceden de la tradición del socialismo utópico siguen apostando por las causas perdidas. En cambio, los que proceden del socialismo científico y sus derivaciones pragmáticas, sólo se apuntan a las ganadoras».

Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN, *La aznaridad*.

En su recorrido por las *desdichas* de la socialdemocracia europea, el historiador británico, Tony Judt, en su última obra –*Algo va mal* (2010)– planteaba una serie de hipótesis y lecturas acerca de la crisis global por la que atravesaban las alternativas posibles –una muy concreta en su caso– frente a la hegemonía del liberalismo de finales del siglo XX y de la primera década del XXI. Afirmaría, asimismo, como los grandes hombres del “liberalismo constitucional” de mediados del pasado siglo, ostentaron una “talla superior”. Interrogándose, a continuación, si “fueron las circunstancias las que produjeron a los políticos o si la cultura de la época condujo a hombres de este calibre a dedicarse a la política”. Según él, tras esa etapa se había llegado a una “época de pigmeos”.

Firmemente convencido de las virtudes de la socialdemocracia como la *única alternativa posible* y del liberalismo parlamentario –“La disconformidad debe permanecer dentro de la ley y tratar de alcanzar sus objetivos a través de los canales políticos”– buscaba respuesta a uno de los grandes interrogantes que han recorrido la presente investigación:

«¿Por qué, durante las tres últimas décadas, les ha resultado tan fácil a quienes ostentaban el poder convencer a los ciudadanos de que las políticas que querían seguir eran acertadas, y en algún caso, necesarias? Porque no había una alternativa coherente. Incluso cuando existen diferencias políticas significativas entre los principales partidos políticos, éstas se presentan como versiones de un solo objetivo».

A lo que se sumaba otro hecho constatado: la *externalización* de las grandes cuestiones macroeconómicas a los *expertos económicos*. En gran medida, estos mismos planteos pueden trasladarse, con cierta similitud, a nuestra investigación. Pues, ¿alguien puede poner en cuestión la “talla superior” de la preparada *generación de socialistas* que conquistó el poder político en octubre de 1982? O acaso, ¿el papel cumbre otorgado a los expertos económicos, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos? E inclusive, ¿la ausencia de una alternativa política realmente diferenciadora en lo económico durante la “década del cambio”?

Otra cuestión sería la *dirección*, el *contenido* como las *metas* buscadas por el proyecto de modernización socialista, a modo de única política posible, y que como se ha sostenido no puede interpretarse, en ningún caso, como una política socialdemócrata –como tiempo tendremos de observar en las siguientes páginas–. Todo un proyecto político que conllevaría una acelerada etapa de cambio político social y, claro está, económico, de la nación entera en menos de tres lustros, hasta modificar su fisionomía social así como su modelo productivo. Unas dinámicas de cambio-social cuyos resultados, precisamente, han sido el objeto de esta tesis doctoral que concluye en las siguientes páginas.

No obstante, antes de pasar a explicar las principales conclusiones de esta investigación, conviene, de nuevo, detenerse en toda una serie de obstáculos que al historiador se le presenta en este tipo de empresas, tal y como se ha podido comprobar epígrafe por epígrafe, capítulo por capítulo. La fuerza del gran relato consensual sobre nuestro pasado reciente contemporáneo, sustentando antes que en explicaciones académicas –y todavía menos en análisis historiográficos– en una viva *memoria social* como en un amplio *imaginario social común compartido*, ha tenido la “virtud” de presentarnos estos vibrantes años de una forma no diremos que positiva plenamente, pero sí sin grandes rupturas y en un tono no conflictivo. Y como sucede en otros tantos periodos de nuestro pasado común reciente, en el mismo momento en que se atraviesa la fina capa de la epidermis de estas *imágenes-fuerza*, resulta que nos encontramos con no pocos matices e incluso con posibles marcos de interpretaciones rupturistas. Especialmente, teniendo en cuenta que todo proceso de cambio social, de mutación de las estructuras socio-económicas en un régimen capitalista, conlleva aparejada una violencia intrínseca –física o no– y un conjunto de *ganadores y perdedores*.

De la misma forma, ha de destacarse la enorme capacidad de esa “superior” *generación socialista* a la hora de dotarse pero también de extrapolar un discurso justificativo, que ha pasado, en la práctica, inmaculado a nuestro presente vivo. La fuerza de lo que hemos venido a denominar como el *realismo mágico* de la “narrativa socialista”, capaz de convertir las *derrotas* en *victorias*, la política económica liberal en una política económica progresista, la temporalidad y el paro en un mero problema estadístico, o directamente la cultura de la precariedad laboral en un problema moral antes que social, está fuera de toda duda. Lo que ya parece más difícil de entender, pasadas más tres décadas, es que investigadores profesionales hayan dado verosimilitud a tales explicaciones como ocurre, sin irnos tampoco muy lejos, con la tesis de que tan sólo hubo “una única política posible”.

Hablando de *consensos* historiográficos ningún otro concepto como el de *progresista* se ha empleado con mayor prolijidad, para definir la *época socialista* y, por extensión, la “década del cambio”. Resulta aquí también –junto con las anteriores *ideas-fuerza* esgrimidas– que serían los propios políticos, técnicos y los “soportes intelectuales del socialismo”, quienes con más empeño emplearán esta etiqueta en la progresiva evolución del *socialismo modernizante*, desde mediados de los ochenta hasta su salida del poder. ¿Estamos ante otro de los “éxitos” de la narrativa socialista? Probablemente. Con todo, y he aquí una primera pequeña-gran conclusión de esta investigación, esta etiqueta histórica, a buen seguro, sea la más certera a la hora de definir la naturaleza y dimensiones de la época socialista, así como la política practicada por sus principales agentes históricos.

Ahora bien, realmente, ¿qué puede entenderse por *progresista* o *progresismo*? Sucede en este campo como con el problema no resuelto por los marxistas a la hora de desentrañar y encuadrar a la clase media, desde su mismo origen: las posibles respuestas no despejan, de

forma total y definitiva, el interrogante propuesto. Estamos, pues, ante un problema de orden conceptual, sin duda, pero que guarda, al mismo tiempo, un mayor trasfondo a la hora de concretar su *naturaleza* y sus *dimensiones*. Quizás lo más esclareedor a la hora de acercarnos a la metamorfosis progresista del *socialismo español*, tanto en términos de cultura política como a nivel de rasgos identitarios antes que a través de una lectura simplista basada en términos ideológicos, sea detenernos en las tres renunciias históricas efectuadas por el socialismo español modernizante. *Renunciias* –tal y como hemos examinado en nuestra investigación– que conllevarían, primero, el no cuestionamiento del modelo económico vigente, segundo, la renuncia a la transformación del orden social, y tercero, a una ruptura histórica con el pasado tanto partidista como histórico.

Así pues, el socialismo modernizante progresista español del último tercio del siglo XX, estaría caracterizado, primero, por un fuerte proceso de desideologización; segundo, por la ausencia de un programa propio diferenciador, sustituido éste por un fuerte pragmatismo materialista –a modo de *causa*-efecto en relación con la primera variable–; y finalmente, dominado por una inconcreción tan buscada como deseada en las cuestiones de contenido político-económico así como en lo referente a las clases sociales a las que representar y/o defender. Lo anterior tendría una pequeña-gran cualidad, pues, ayudaría, a su manera, a reforzar el relato consensual dominante, de izquierda a derecha, desde los liberales, pasando por los socialdemócratas e inclusive los conservadores, al no cuestionarse el *socialismo progresista* las bases consustanciales del modelo económico dominante.

Dicho esto, ¿los anteriores puntos de partida básicos de esta investigación, fundamentados en no pocos datos como evidencias, empezando por el propio reconocimiento de tal hecho por los políticos y los “soportes intelectuales del socialismo– ayudan a explicar mejor la dirección político-económica de la “época socialista” así como resultados? Sí.

Volviendo ahora al argumentario expuesto por Tony Judt, los socialistas españoles se habrían hecho acreedores de una *narración moral* propia, bajo la defensa de la idea-fuerza del “progreso” procedente de la *Ilustración*. Una *narración* en donde se transmutaría, en una primera etapa, lo *ético* por lo *estético*, para al final desarrollar un relato *aséptico*, en términos ideológicos y, puestos al caso, políticos. Un relato sin aparentes *fracturas* ni *contradicciones*, propios de una historia militante u oficialista y que conectado, a su vez, con la lectura dominante y hegemónica por extensión, en términos generales, no ha sido puesta en cuestión.

Por más que fuera académicamente desaconsejable salir del “abrigo” de los *cálidos* como *aparentes* consensos historiográficos citados, la propia evolución de nuestra investigación así lo obligó. Más aún cuando se trataba de inaugurar, en la práctica, una *agenda investigadora* que a los historiadores se les resiste por barreras visibles e invisibles.

Ocurría aquí un hecho del todo categórico: si se leía el volumen colectivo *La década del cambio* coordinado por Alfonso Guerra y José Félix Tezanos, no cabía duda de cómo la citada *generación superior socialista* había realizado un histórico e ímprobo esfuerzo de modernización de España, con ciertos costes sociales como humanos pero asumibles en cualquier caso; empero, contrastar aquella amena lectura con las tesis incómodas de Petras en su muchas veces citado *informe*, al menos, dejaba un resquicio a la duda sobre las virtudes de las políticas llevadas a cabo por los ejecutivos socialistas. Una duda metodológica e histórica bastante razonable, todo sea dicho. Y como se trataba, a fin de cuentas, de encontrar y razonar una respuesta, se optó por el camino espinoso de la contrastación-refutación del trabajo histórico.

Desde ese instante, no dejarían de enlazarse una pregunta tras otra en una perspectiva cada vez más global: ¿Cuáles eran las causas y los porqués de la formación histórica de la “cultura de la precariedad”? ¿Qué dimensiones históricas habían conllevado el cambio social, económico, acaecido en la época socialista? En suma, ¿cómo y por qué había cambiado el modelo de producción? Interrogantes supraestructurales que dieron sentido y origen a otras tres grandes cuestiones que conformaron nuestras respectivas hipótesis de trabajo, y cuyas

conclusiones se exponen a continuación, como previo a internarnos por lo que hemos denominado como los tres *grandes éxitos* de los gobiernos socialistas.

¿Qué papel histórico decidió jugar el PSOE al frente del Gobierno en el proceso de salida a la crisis económica procedente de los setenta? A lo largo de los capítulos 4 y 5 se ha recorrido la transición política del socialismo español desde la llegada de una *nueva generación de socialistas*, comandada por Felipe González, Alfonso Guerra pero también por Nicolás Redondo. Transición que se iniciaría en 1972 y finalizaría en 1982. Una larga década en donde el PSOE lograría despojarse de la llamada *sobrecarga ideológica* y transformarse, a su vez, en el partido de “la modernización”, hasta conquistar el poder político por una amplísima mayoría absoluta en octubre de 1982. Una historia, en general, bastante bien conocida pero que depara más de una “sorpresa historiográfica” cuando se procede a meter el *bisturí*.

En tal transición, tal y como se ha pretendido demostrar a través del empleo de un amplio corpus documental en buena parte inédito, se modificarían –cuando así se consideró oportuno– los principios ideológicos y programáticos en una cada vez más evidente moderación política. Por este mismo camino, la *cultura política* así como sus características *identitarias* evolucionarían hasta poder hablar de un partido “nuevo” a principios de los años ochenta. Sin renunciar hasta mediados de los ochenta a la construcción de una nueva sociedad socialista en el plano teórico, el materialismo político se impondría por medio de una vasta operación de ingeniería político-estratégica, para lo que se contaría con un conjunto de estrategias e intelectuales de primer orden. Todo ello a través de un laborioso y minucioso trabajo de “poda ideológica”, hasta despojar al histórico socialismo español de cualquier raíz ideológica diferenciadora, incluida su propia *memoria histórica* tras las elecciones legislativas de marzo de 1979. En realidad, y como se ha defendido, el debate sobre la definición del marxismo a lo largo de los dos congresos socialistas –el XXXVIII y el Congreso extraordinario de mayo y septiembre de 1979, respectivamente– se nos aparece, en términos políticos, de una menor relevancia histórica de la comúnmente otorgada. Todo ello frente a un conjunto de pequeños acontecimientos y de decisiones –generalmente sin la participación de la militancia y dirigidos por la Ejecutiva socialista– mediante los cuales se iría definiendo la *verdadera* esencia de la fisionomía del *nuevo* Partido.

En un cada vez más difícil equilibrio entre esa misma práctica discursiva y el imperante pragmatismo político dirigido a conquistar el poder político como objetivo central, la familia socialista en su conjunto –Partido y Sindicato al unísono– reformularían su “misión histórica” primigenia, para a través de un singular análisis histórico-social dotarse de una nueva *misión* más acorde con los tiempos. En tanto, según razonarían los propios socialistas, la derecha política y económica representada entonces por UCD, no había querido como tampoco había disfrutado de las condiciones objetivas y subjetivas necesarias de cara a realizar la *revolución burguesa pendiente*; el socialismo español sacrificaría así su ideario y su programa en pos de esta misma “revolución” como paso previo a la construcción del socialismo. Un análisis en extremo determinista, y basado en sucesivas fases históricas –en un ejemplo de marxismo cosificado– que le sería especialmente útil en la recta final del PSOE en su conquista de poder político –de forma específica, entre 1980 a 1982, a saber entre la celebración de su XXXIX Congreso a la elaboración del programa electoral *Por el cambio*– para realizar el último y más importante reajuste programático. En nombre de la responsabilidad de la consolidación de la democracia y del desarrollo económico de la nación en su conjunto, se producirían todo un conjunto de *renuncias históricas*. De ahí se pasaría a la preparación inicial del proyecto de modernización socialista. Una interpretación que difiere, en extremo, de los análisis histórico-políticos al uso –como se trató de mostrar en los apartados 2.2.10 y 2.2.11 y a lo largo de los epígrafes II y II, respectivamente– en base a lo que se aprueba o no se aprueba en un Congreso o en una resolución, y que nos aboca a repensar globalmente la transición del socialismo español bajo otros *presupuestos* políticos menos clásicos.

La confirmación de la hipótesis del PSOE como el “partido de la modernización” nos conduce a tres conclusiones básicas: la primera, y más relevante en términos históricos, el socialismo español antes de su llegada al poder no era un partido socialista al uso, a nivel

ideológico. A lo sumo, socialdemócrata en su vertiente programática antes que práctica, aunque con cada vez una mayor influencia y predominio de las tesis liberales-progresistas, y en donde el Equipo Económico del PSOE –comandado por Boyer– adquiriría una relevancia de primer orden en la formulación y puesta en marcha del proyecto de modernización socialista. En segundo término, la nueva *misión histórica* del PSOE una vez conquistado el poder político, conllevaría un progresivo así como acelerado proceso de alejamiento de cualquier proyecto político vinculado a la izquierda política, incluyéndose aquí la renuncia explícita a su *programa electoral*, con especial renuencia de sus propuestas económicas-laborales. La posterior conformación de los equipos económicos –principalmente en Economía, Industria pero también en Trabajo– nutriéndose de hombres –con una insignificante presencia de mujeres– procedentes de las escuelas económicas y liberales tanto del franquismo como del antifranquismo así como de sus propios centros de poder económico-financieros, ayudaría a recorrer la última y efímera etapa de lo político a lo pragmático. La tercera conclusión que cobra una relevancia destacable, es la constatación de los pactos y alianzas que se establecerían con la patronal pero también con parte de la clase dominante, a quienes asegurarían antes de tomar posesión no sólo la tranquilidad política-económica de que no se cuestionaría el orden social vigente, sino que se contaría con ellos para las propias tareas modernizadoras. Una etapa que se puede hacer llegar desde septiembre/octubre a noviembre/diciembre de 1982, y sobre la que aún pesan no pocos interrogantes, ante la ausencia de mayor documentación y/o testimonios significativos al respecto.

En suma, a lo largo del segundo epígrafe –*La conquista del poder político del socialismo español: la misión histórica del PSOE (1972-1982)*– se ha presentado, en base de la mayor parte de la documentación hoy disponible, una interpretación plausible de las vías a través de las cuales se llevaría a cabo la reestructuración del modelo capitalista español en una versión liberal-progresista. Y, es exactamente, esta última cuestión la que ha sido omitida de forma general por los grandes relatos –historiográficos, económicos, politológicos o sociológicos– quienes han tendido a obviar –¿consciente o inconscientemente?– la variable del modelo económico. Por tanto, el examen tanto de la transición del socialismo español como de su acceso al poder por vías democráticas, ayuda a examinar, en términos históricos, el nacimiento, la formación y la consolidación de una nueva coalición de poder político-económico que actuaría, de forma consciente, como el sujeto histórico necesario para la transición del modelo de acumulación capitalista franquista a la segunda fase del modelo de acumulación de la España del presente vivido.

Desde el mismo 1 de diciembre de 1982, esta nueva coalición del poder iniciaría un permanente proceso de aprendizaje colectivo liberal, de cara a la puesta en marcha del proyecto de modernización socialista. Con muchas más resistencias de las esperadas, que inclusive a punto estarían de descabalar el citado proyecto en su primera fase de implantación, etapa por etapa iría conformando la *salida liberal* a la crisis económica de los setenta, en base a los postulados de la “nueva lógica” (neo)liberal que se implanta a escala mundial desde fines de los setenta. Puesto en marcha, no habría vuelta atrás, hasta el punto de que la única política que nunca se pensaría modificar, sería la económica, más allá de las voluntaristas llamadas al “diálogo social”. El *síndrome NHA* –en palabras de José María Maravall, “síndrome «no hay alternativa»”– se convertiría en una realidad histórica. *Síndrome* pero también *fe inquebrantable* en las virtudes de la política liberal, al coste de la traumática ruptura de la familia socialista a partir de octubre de 1987.

De esta forma, más allá de las tan sonadas como interesadas filtraciones en torno a las divisiones en el Consejo de Ministros entre sus dos supuestas *sensibilidades* –la liberal y la teóricamente socialdemócrata– y con ciertas repercusiones menores en el Partido; al menos, durante la “década del cambio” todas y cada una de las contradicciones del socialismo español siempre se resolverían a favor del ala liberal con el apoyo expreso del Presidente del Gobierno. Otro tanto sucedería también con la propia resolución de los numerosos *trade-off* –principalmente entre inflación y desempleo– a los que se tuvieron que enfrentar. O explicado de otra forma: pese a las numerosas lecturas sobre el carácter social o inclusive socialdemócrata de

la política económica socialista, en la presente tesis doctoral se ha intentado poner en evidencia, como dicha política se fundamentó en la teoría como en la práctica en base a los postulados liberales en boga. A saber, se apostaría por una *salida y consolidación* favorable para los sectores capitalistas de la nación.

Partiendo de esta misma *tesis fuerte*, se puede responder a nuestro segundo gran interrogante a modo de hipótesis de trabajo: *¿En torno a qué objetivos centrales basculó el proyecto de modernización en la apertura y consolidación de una nueva etapa en la historia del capitalismo español?* Las grandes como en no pocas veces frustradas batallas contra la inflación, el déficit público y por la liberalización de la economía española, así lo demuestran. Igualmente, como se ha analizado, de forma detenida, no se cuestionaría la política emprendida desde los Pactos de la Moncloa. Al contrario, pues se fortalecería la misma en la dirección y metas apuntadas. La elaboración y concreción del Programa Económico a Medio Plazo (PEMP), de los Presupuestos Generales del Estado o medidas tan significativas como el *decreto Boyer*, constituyen su definición programática más acabada. Lo anterior con un rasgo común denominador: frente a la imagen de fiabilidad de los políticos y técnicos socialistas, a lo largo del Epígrafe *III Los ejecutivos socialistas y la reestructuración del modelo capitalista español (1982-1992)*, se han presentado no pocas evidenciadas de los fallos estrepitosos de un sin fin de proyecciones macroeconómicas, así como se ha cuestionado la hipótesis sobre su capacidad de ejercer la dirección económica del país.

Avalado el proyecto de modernización socialista por las grandes entidades económicas internacionales –entre otras, el FMI, la OCDE o el BM– otro rasgo caracterizador del accionar gubernamental, sería su ligazón, a nivel estético como simbólico, con el mundo empresarial, tan alejado del *mundo del trabajo* del que procedían los socialistas españoles en su mayor parte. No es este un detalle menor o baladí, pues junto con la elaboración de todo un discurso justificativo antes que explicativo sobre las *posibilidades* de tal proyecto, también se combinaría el mismo con una metanarrativa de no poco alcance a la hora de la construcción de los valores sociales y éticos. Una *narrativa pedagógica* más cercana a la “sociedad de propietarios” británica que a la sociedad democrática y participativa que emanan de los presupuestos programáticos socialistas. Los socialistas españoles pondrían un mayor empeño en atraer antes a la *nueva clase media* que a los sectores populares y obreros. Valga un ejemplo tan revelador de esos pequeños detalles, que como se ha explicado son tanto o más importantes a la hora de adentrarnos en este mismo tiempo histórico. Desde las propias páginas de *El Socialista*, a través de no pocos anuncios, se promocionaría la compra de acciones –incluidas, en un primer momento, las de RUMASA– la participación en bolsa o directamente la especulación inmobiliaria, además de resaltar –en este caso, a través de sus páginas de opinión y análisis– las altas ventajas de contratar a jóvenes por y mediante las grandes oportunidades que ofrecería la legislación laboral aprobada en estos mismos años.

En este mismo sentido, el estudio de caso realizado sobre la convocatoria y el desarrollo de la Huelga General del 14 de diciembre de 1988 –en concreto en el apartado “7.2. Un anexo obligado: el antes, el durante y el después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Un «obstáculo» en el *único camino posible* de la economía política socialista?”– junto con lo apuntado previamente en el Capítulo 6, ayuda a visualizar las dinámicas e inercias del accionar gubernamental de los ejecutivos socialistas. Si la lucha contra la inflación se convertiría en una permanente *constante* para el Gobierno presidido por Felipe González, otro tanto sucedería con la flexibilización del mercado de trabajo, y más concretamente en lo referido a la contratación de los jóvenes. Una generación de jóvenes siempre tan presentes tanto en los propios discursos del señor Presidente como en el BOE. Cuando no habían transcurrido ni cuatro meses de su llegada a La Moncloa, por primera vez, González hablaría de la necesidad de flexibilizar las políticas de empleo juvenil. Desde entonces y hasta octubre de 1988 cuando se aprobaría el conocido Plan de Empleo Juvenil (PEJ) en un sonado Consejo de Ministros, tal proyecto –estrechamente ligado al proyecto de modernización socialista– pasaría a ser otra auténtica *constante* gubernamental. Una obcecación que costaría no pocos disgustos y enfrentamientos tanto a nivel interno de la familia socialista como con el movimiento sindical.

Cuando se han revisado las demandas y peticiones por parte de UGT y de CCOO con respecto al 14-D y más concretamente en torno al denominado *giro* social, nos hemos encontrado con un programa de corte socialdemócrata y moderado, que reclamaba, sencillamente, lo que también se conoció como el “pago de la deuda social”. Un programa, por cierto, bastante similar a lo defendido en cada uno de los programas electorales socialistas. Sería la contundente respuesta del Gobierno pero principalmente del Partido frente a tal convocatoria, la que nos proporciona no pocos *caminos de aproximación* históricos para interpretar, de forma adecuada, la metamorfosis total del socialismo español superado el ecuador de la década de los ochenta. La creación de un ambiente social contestatario junto con el posterior éxito de la propia Huelga General del 14 de diciembre, acreditarían como los gobiernos socialistas eran ya el poder en mayúsculas. No faltaron en esos mismos años la comparación entre el Gobierno socialista y el PRI mexicano. La desairada reacción posterior al 14-D en donde pondría fin a su supuesto obrerismo –negando que en España hubiera obreros en una operación de cierto calado que concluiría en el XXXII Congreso del PSOE en noviembre de 1990– confirmaron todas estas hipótesis. A lo que se sumaría la *culpabilización* directa del parcial como corto-placista *giro social* impulsado por el Gobierno en 1989, de la posterior crisis económica de los noventa en consonancia con los postulados esgrimidos por los *expertos liberales*.

Aunque sea a costa de adelantar un conjunto de valoraciones y conclusiones, las lecturas mayoritarias han insistido en la tesis de la imbatibilidad electoral del socialismo, asociándolo intencionadamente a un apoyo popular a sus propios gobiernos, o, en su caso, a una especie de legitimación de su política. Pero como también se ha intentado demostrar, reducir la dinámica de oposición y contestación a los resultados de las elecciones generales, municipales, autonómicas o europeas, es una muy pobre vía de aproximación a una problemática más global y en donde se hayan interconectadas no pocas dimensiones históricas. ¿Por qué? Por la sencilla como evidente razón de que la hegemonía electoral no se tradujo, en momento alguno, ni en una hegemonía política, ni en una hegemonía social ni menos en una hegemonía económica. Centrándonos en este último aspecto, los ejecutivos socialistas pese a sus amplias mayorías parlamentarias no tuvieron ni la capacidad ni la autonomía suficientes para llevar adelante la reforma fiscal original diseñada por José V. Sevilla u otros tantos proyectos. ¿Falta de voluntad política? O, sencillamente, ¿una nueva evidencia de materialismo político-económico? Lo cierto, es que en el terreno estrictamente económico, los políticos y técnicos socialistas pactarían no pocas reformas económicas y financieras de no poco alcance con la clase económica dominante, en una política de alianzas que se reforzaría mutuamente hasta su salida del poder.

En relación a nuestra tercera hipótesis de trabajo, formulada de la siguiente manera: *¿Cuáles fueron los principales costes sociales y humanos de las políticas reformistas-liberales de los ejecutivos socialistas?* las respuestas históricas que se han podido obtener discurren, en paralelo, a la resolución dada a los anteriores interrogantes. De entrada, se ha de afirmar como nunca se alcanzaría el “círculo mágico” tantas veces pregonado por los mismos socialistas, como tampoco habría *salto adelante* en la “década del cambio”. Y este sí es un terreno conflictivo a la hora de las interpretaciones. Poner en duda –y no digamos cuestionar– que durante esta etapa histórica no se produjera un progreso social puede resultar del todo problemático. Como hemos destacado en más de una ocasión, si la *narrativa socialista* se mudaría en un valioso instrumento político-estratégico de cara a justificar el único camino del proyecto de modernización socialista; otro tanto sucedería con el empleo, a la mejor luz posible, de las estadísticas oficiales cuando así se estimó necesario y oportuno. Se han presentado no pocas evidencias de cómo los socialistas –tanto desde el Partido como desde el Gobierno– actuaron este campo: bien por la vía de la manipulación interesada, o bien, por la instrumentalización descarada, los políticos y técnicos socialistas se transformarían en unos consumados expertos en *glosar* las virtudes de su política macroeconómica. En contraste, tal *baile de cifras* queda en entredicho cuando se lleva a cabo un balance global abierto y no sectario de estas mismas realidades. En el Capítulo 8. *El precio de la modernización. «Principios de realidad» esenciales: los resultados macroeconómicos*, se ha tratado de responder a no pocos interrogantes, empezando por el más evidente: ¿era la sociedad española

en mil novecientos noventa y dos más igualitaria que diez años antes? A partir de la valoración y análisis historiográfico del material empleado, resulta que el amplio conjunto de respuestas obtenidas nos presentan un cuadro radicalmente diferente al presupuesto generalmente, para inclinarse por una respuesta negativa.

No se está aquí afirmando, en modo alguno, que la política económica socialista fuera un fracaso. Antes al contrario, fue enormemente exitosa. Ahora bien, ¿para quién o quiénes? Por un lado, es innegable que se generaron las condiciones necesarias para la modernización del país. Condiciones que siempre se sustentaron en la dirección de aumentar la inversión privada, como el principal motor económico. A ello responde, sin duda, la lucha contra la inflación y el déficit público y los ímprobos esfuerzos en la liberalización de la economía de España. Los resultados en esta dirección tardaron en llegar pero cuando llegaron se mostrarían y se venderían como un gran éxito: crecimiento histórico de los márgenes de ganancia del capital privado, mejora de la productividad e incrementos espectaculares de los beneficios empresariales financieros y no financieros, con una cada vez mayor presencia del capital especulativo. El *boom económico* de mediados de los años ochenta es su ejemplo más acabado. Pero como también se ha tratado de argumentar la fragilidad del modelo económico por el que se apostó, se evidenciaría con la profunda crisis económica de los noventa, pese a lo cual se reforzarían, en adelante, las líneas dominantes de actuación macroeconómica. Así el siempre precario equilibrio de las principales varias macroeconómicas fue, en realidad, un efímero como breve episodio de la historia del capitalismo español en la “década del cambio”. Por tanto, la lectura de una “historia de éxito” se nos aparece, a través de este examen, bastante devaluada cuando se efectúa un planteo general sobre el conjunto de estos años.

Como afirmábamos no habría ni *salto adelante* ni se alcanzaría ningún “círculo mágico” económico en la “década del cambio”, cuando se comparan los resultados de dichas políticas en la perspectiva de sus costes sociales y humanos. No sólo es que los socialistas –como creemos que también se ha tratado demostrar– carecerían de una política industrial pública o de una política de planificación democrática de los recursos económicos y materiales; sino es que, además, carecieron de un proyecto viable a medio y largo plazo de construcción de un Estado del bienestar moderno y comparable con los estándares europeos. Las centenares de cifras dadas sobre el gasto social reflejan una cruda realidad histórica: el gasto social, tanto en términos absolutos como relativos, manifestaría una ligera tendencia creciente, en cualquier caso, siempre por debajo de las tasas de crecimiento de la economía. O dicho de otra forma más gráfica: no se afrontaría de forma eficaz ni duradera la *cuestión social*. A lo anterior, habría que sumar, en otro plano complementario, el permanente cuestionamiento de lo “público” a través de no pocas declaraciones pero sobre todo por medio de *ilustres* reformas legislativas, que se llevarían por delante no pocos derechos producto de la conquista de decenas de años de lucha del movimiento obrero. Aquí tan sólo para la primera legislatura socialista se podrían citar la Ley 32/1984 o la Ley 26/1985. Todo ello conduciría a una contradicción tan típica de la época socialista: por un lado, la ampliación jurídica de derechos universales y, por otro, la reducción y/o eliminación de derechos sociales y económicos.

Empero, el mayor *precio* del proyecto de modernización socialista se ha de buscar en otras cuestiones más materiales, pero tanto o más relevantes de la nueva composición de la estructura socioeconómica y clasista de la España de este tiempo. La agresiva y radical política de “moderación salarial”, conllevó una considerable pérdida de capacidad adquisitiva para el conjunto de la clase trabajadora con no pocas consecuencias *ah hoc*. Una tesis fuerte también, pero que gracias al empleo de un numeroso material estadístico también se ha demostrado como una variable histórica a tener presente.

Una política de la mal llamada “moderación salarial” que a su vez se ha de interconectar con la lucha contra el déficit público y otras tantas medidas, y que si bien alcanzaría uno de sus objetivos –una mano de obra barata, flexible y dócil por extensión– produciría una pérdida de capacidad de las rentas del trabajo en comparación con las tasas del excedente neto de explotación, como la expresión máxima de la *dirección y costes* de la política económica liberal de los socialistas. Pero no concluyen ahí las lecturas posibles ni los ángulos de interpretación

histórica. En el apartado 8.4. *Un posible balance en torno a la época socialista alejado de los lugares comunes*, se trató de manifestar históricamente un aspecto fundamental que define en su totalidad al citado proyecto de modernización socialista: nunca en la historia de la España contemporánea –entre 1954 a 2001– se incrementó hasta tales niveles la tasa de plusvalor. A saber, la época socialista registró el mayor incremento de las tasas de explotación capital-trabajo. Y es, justamente, sobre esta misma cuestión sobre la que han pasado de *puntillas* la mayor parte de los estudios.

Por estos caminos ensayados, la conclusión a nuestro tercer interrogante se nos aparece clara: la clase trabajadora o si se prefiere los asalariados –en términos más asépticos, en consonancia con las tesis progresistas– serían los principales *perdedores* del proceso de reestructuración del modelo capitalista español. Llegados aquí, lo que corresponde, por tanto, es interrogarse si esta era una de las condiciones *sine qua non* para el triunfo tantas veces glosado de la estrategia modernizadora socialista.

Sin embargo, la tesis doctoral que ha llevado por título *Modernización socialista y reforma laboral (1982-1992)* viene a aportar otras tres grandes conclusiones. Dicho con toda la humildad posible, el gran valor –a modo de enseñanza en el quehacer historiográfico– de nuestro estudio de caso desarrollado en el Epígrafe IV. *Historia de una reforma laboral: contrahegemonías, crisis, conflicto y violencia en el proceso de liberalización del mercado de trabajo*, ha sido el plantear un conjunto de interpretaciones sobre lo que hemos denominado como los “grande éxitos” de la época socialista.

A partir de un nuestro enfoque, que tiene por vector explicativo elemental la centralidad de las relaciones capital-trabajo, se ha examinado, desde una perspectiva microhistórica, la formación, consolidación y el desarrollo del primigenio “modelo español de concertación social español”, hasta alcanzar su denominada *fase superior de desarrollo*, al albur de las negociaciones de la Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 y del AES. Nos hemos detenido en su formación y desarrollo, en la propia naturaleza histórica que adquiere, así como en todos y cada uno de los sujetos políticos y sindicales que intervienen.

Empleábamos para abrir el Capítulo 10. *Historia e intrahistoria de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984*, la célebre cita atribuida a John Godfrey Saxe y/o Otto von Bismarck: “Las leyes como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas”. Así es. Las intrigas, las conspiraciones, las traiciones... junto con sus reuniones secretas, privadas, restringidas... a la par que nos hablan de la política pura y dura así como de su gran representación, obligan a replantearse la exaltación y glosa del *canonizado* “modelo español de concertación social” a una altura similar al “modelo español de transición”.

Pero desde una perspectiva como la aquí trazada, quizás, tan sólo quizás, hubiera sido más conveniente empezar el citado capítulo con una aclaratoria frase de Fidel Alonso, quien llegaría a ser Secretario General de la Unión de Madrid de CCOO, cuando en diciembre de 1983, afirmaría como el pacto social es un “instrumento de los capitalistas”. Así pues, nuestra primera conclusión parcial al respecto, difiere en mucho de las versiones consensualistas al uso. De esta forma, el modelo de concertación social español, tal y como se ha tratado de probar, se convertiría en un poderoso instrumento político fomentado por los diferentes ejecutivos –desde UCD al PSOE– con el objeto de alcanzar los consensos económico-sociales necesarios para legitimar la políticas liberales de cada momento, y si siempre que fuera posible, además, lograr la siempre buscada “paz social”. Pero sobre todo el citado modelo de concertación se transformaría en el mecanismo idóneo para la precarización legislativa del ordenamiento jurídico-laboral. Llámese o no precarización, o si se prefiere, flexibilización, observar de forma detenida la liberalización del SERL nos lleva al punto de origen del nacimiento de la “cultura empresarial de la precariedad laboral”. A saber, nos ofrece un posible marco de respuesta a nuestro interrogante central y que, a su vez, ha estructurado nuestra investigación.

Es por y a través del examen de este mismo “modelo español de concertación social” – en concreto una vez que alcanza su citada *fase superior de desarrollo*– cuando se pueden

visualizar los aquí denominados tres “grandes éxitos” de la época socialista. El primer y más trascendental aporte –en términos históricos– de los ejecutivos socialistas sería la legitimación del modelo económico capitalista español, a lo largo de su primera legislatura. No sólo se superaría una aguda fase de crisis social generalizada, que a punto estaría de provocar una crisis institucional-política de dimensiones inimaginables, en una coyuntura de continuo *ruido de sables* y de una enorme violencia política –terrorista pero también estatal– sino que sería capaz de consolidar, y por ende legitimar, el modelo económico dominante, tras no pocos titubeos y una suma de debilidades políticas que nos presentan un cuadro de la transición posfranquista enormemente complicado a la par que repleto de matices. Como segunda gran conclusión, y en relación a lo anterior, bajo los gobiernos socialistas se conseguiría eliminar otras posibles vías de desarrollo o modelos políticos alternativos, aunque el precio fue una democracia pluripartidista limitada y con un escaso peso de la sociedad civil como afirmaría el propio James Petras. O traducido en términos de las lecturas mayoritarias: se asistiría a la consolidación de la democracia.

El logro tanto de la *legitimación* del régimen económico dominante como de la *consolidación* del sistema político democrático-liberal, dependió de una gran condición *sine qua non*, tanto o más trascendental: *la derrota del movimiento obrero*. Una hipótesis de trabajo de cierto calado, tanto por lo que supone en términos de novedad histórica como por sus propias implicaciones, que creemos que ha quedado lo suficientemente fundamentada a partir de nuestro estudio de caso.

Aquí también se superaría con nota todo un *reto histórico*, tras el último episodio de lucha de clases en la España contemporánea, descrito en el Capítulo 11. *En busca de la «paz social»: antecedentes, entresijos y componendas del nuevo pacto social (enero/febrero 1984-julio 1984)*. Nos encontramos, pues, ante el que sea, probablemente, el más importante éxito de los socialistas españoles. Una derrota histórica que invalidaría al movimiento obrero como un posible sujeto político-sindical opositor. Un fenómeno histórico, por cierto, de escala internacional.

De cara a alcanzar tal fin buscado y deseado, no se dudaría en emplear todos los mecanismos de consenso y dominación a su alcance. En el caso de los mecanismos de consenso, a través de vías legales, pseudo-legales o directamente ilegales, por más que se llegara a cuestionar el propio funcionamiento del siempre precario *Estado de Derecho*. Por otro lado, en el caso de los mecanismos de dominación, se emplearía la represión policial, parapolicial o inclusive militar, contra el considerado como *enemigo*, *opositor* o *adversario*, generalmente, representado con los sectores más combativos del movimiento obrero. Es casi seguro que en España bajo los gobiernos socialistas –al menos por lo que hoy se conoce y se tiene constancia documental– no se emplearían los servicios secretos en tales labores, como así sucedió en la Gran Bretaña de Thatcher con las huelgas de los mineros. Probablemente no se llegó a este extremo porque no se consideró necesario, inclusive a lo largo del I Trimestre de 1984. En todo caso, no es esta hipótesis menor a descartar en el futuro, cuando se recorre la historia de violencia política empleada contra el movimiento obrero y, de forma específica, contra Comisiones Obreras y no pocos sectores autónomos. Más aún cuando se tiene presente una variable: la institucionalizada política de terrorismo de Estado vía los GAL. Y si sacamos a relucir esta misma hipótesis en estas líneas finales, es para dar buena cuenta de cómo bajo los ejecutivos socialistas el fin justificó los medios en el más definido sentido maquiavélico, contra el que se consideró en su momento como el principal enemigo –sin las recurrentes comillas o cursivas– a batir.

Por tanto, el movimiento obrero más combativo y la clase obrera más consciente no fueron incorporados o integrados en el nuevo régimen de democracia de mercado, como se ha mantenido comúnmente en ciertas lecturas “amables”. No eran una mayoría dentro de la clase trabajadora, pero sí tenían una representación y una presencia cualitativamente relevantes. Tampoco parece posible en términos historiográficos mantener para la época socialista las tesis de Robert Fishman acerca de la *desmovilización por arriba y por abajo*. Si CCOO en su momento histórico no decidió convocar una huelga general fue, probablemente, por su

pronóstico de que la misma hubiera podido *tumbar* al Gobierno, sin que hubiera alternativa posible viable.

¿El movimiento obrero sin su épica y sus victorias carece de narrativa propia? Así parece ser en este caso concreto. Sucede en este mismo espacio como con la muy fragmentada y parcial bibliografía historiográfica para la época socialista: apenas ésta comienza a andar y con no pocos recelos. Sin ningún género de dudas, la historia social tiene una asignatura pendiente en la construcción y relectura de la derrota histórica del movimiento obrero español en la época socialista.

En los múltiples caminos por recorrer a lo largo y ancho de la época socialista, posiblemente, el más urgente sea el promover una *historia social desde abajo y con los de abajo*, a modo de una segunda necesaria etapa de esta misma agenda investigadora siempre incompleta. Y afirmamos esto, ya que tras estos años de investigación somos de la opinión de que hoy conocemos las dinámicas y tensiones históricas que acarreó el proyecto liberal socialista de forma parcial y fragmentada. Nos falta, pues, conocer a los otros actores y sujetos históricos que no transitaban por los despachos, por los salones de las ruedas de prensa o por los lujosos pasillos gubernamentales y menos por el de los selectos clubs económicos.

Necesitamos reorientar nuestra mirada, nuestras preocupaciones sociales a la par que académicas, hacia abajo y con los de abajo. Resulta perentorio dirigir nuestra atención a lo que Manuel Vázquez Montalbán llamaría los “peatones de la historia”. ¿Podría ayudarnos el recorrer las vidas de estos mismos *peatones de la historia*, a la hora de interpretar mejor la *otra cara* del proyecto de modernización socialista? Ahí está la historia de los obreros y estudiantes muertos a mano de la policía –o cuerpos parapoliciales– en tiempos de la UCD como del PSOE en lucha contra la liberalización del mercado de trabajo y contra la reconversión social. ¿Conoce alguien hoy quiénes fueron José Luis Montañés, Emilio Martínez, Raúl Losa García, Pablo González Larrazábal, Gonzalo Ruiz...? No creemos. A los mismos habría que sumarles los centenares –o mejor dicho miles– de heridos –muchos de ellos de bala– junto con otros centenares de represaliados políticos y judiciales... que nos retratan una historia de violencia política durante estos años como el mejor secreto guardado de todo un tiempo histórico. Quizás, insistimos, internándonos y escrutando sus historias personales a la par que colectivas, podamos acercarnos a esa tarea que nos encomendaba a los historiadores el propio Vázquez Montalbán, cuando solicitaba extraer de cada testimonio, de cada hecho de lo social, la “proteína pura de la verdad histórica”.

Madrid, septiembre 2012.

Bibliografía

ABAD, Irene, *Las mujeres de los presos políticos. Represión, solidaridad y movilización en los extramuros de las cárceles franquistas, 1936-1977*, Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 2007.

- *Las puertas de la prisión. De la solidaridad a la conciencia política de las mujeres de los presos del franquismo*, Barcelona, Icaria, 2012.

ABADÍA, Antonio, “Evolución del tipo efectivo en los impuestos directos”, *Investigaciones Económicas*, vol. XIII, nº 1, (1989), pp. 45-66.

ABELLA, Carlos, *Adolfo Suárez*, Madrid, ABC, 2005.

ABERCROMBIE, Nicholas, HILL, Stephen y TURNER, Bryan S., *Diccionario de Sociología*, 2ª ed., Madrid, Cátedra, 1992.

ABRAHAM, Filip, “Social protection and regional convergence in a European Monetary Union”, *Open Economies Review*, vol. V, nº 1, (1994), pp. 89-114.

ABRAHAMSON, P., “Regímenes europeos del Bienestar y políticas sociales europeas: ¿Convergencia de solidaridades?” en MORENO FERNÁNDEZ, Luis y SARASA URDIOLA, Sebastián (comps.), *El Estado del Bienestar en la Europa del Sur*, Madrid, CSIC, 1995, pp. 113-156.

ABRENA, Matthew, EPSTEIN, Gerald y POWER, Dorothy, “Trends in the Rentier Income Share in OECD Countries, 1960-2000”, *PERI Working Papers*, nº 58, (2003).

ACKERMAN, Frank, *Reaganomics: Rhetoric vs. Reality*, London, Pluto Press, 1982.

ACCORNERO, Aris y MAGNA, Nino, “El trabajo después de la clase obrera”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 38, (1987), pp. 75-92.

Actes del Congrés la transició de la dictadura franquista a la democràcia: Barcelona, 20, 21 i 22 d'octubre de 2005, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona / Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, 2005.

ADELANTANDO, José, NOGUERA, José Antonio y RAMBLA, Xavier, “Las políticas de protección social: sistema de pensiones y prestaciones por desempleo” en GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), *Políticas públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno*, Barcelona, Ariel, 1998, pp. 200-222.

- (coord.), *Cambios en el Estado del Bienestar: políticas sociales y desigualdades en España*, Barcelona, Icaria / Universitat Autònoma de Barcelona, 2000.

ADONIS, Andrew y HAMES, Tim (eds.), *A Conservative Revolution? The Thatcher-Reagan Decade in Perspective*, Manchester, Manchester University Press, 1994.

AGENCIA DE INNOVACIÓN DE BIZKAIA, *Modelos De vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva*, Bilbao, BIA, Berrikuntza = Agencia de Información, 2007.

AGLIETTA, Michel, *Regulación y crisis del capitalismo: la experiencia de los Estados Unidos*, Madrid, Siglo XXI, 1979.

- MOATTI, Sandra, *El FMI. Del orden monetario a los desórdenes financieros*, Madrid, Akal, 2002.

AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE INFORMACIÓN LABORAL, “Desempleo y contratación temporal: los grandes protagonistas en 1984”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1985), pp. 1358-1362.

AGUADO, Ana y ORTEGA, Teresa Mª (eds.), *Feminismos y antifeminismo: culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX*, València / Granada, Universitat de València / Universidad de Granada, 2011.

AGÜERO, Isabel y OLANO, Alberto, “Oferta de trabajo de jóvenes: aspectos demográficos y económicos” en *Los jóvenes y el empleo*. Dossier monográfico, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 1-2, (1988), pp. 12-29.

AGÜERO MENÉNDEZ, Isabel y GIRÁLDEZ NÚÑEZ, Mª Teresa, “La jornada de trabajo en España: un análisis estructural”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 15-16, (1992), pp. 88-104.

AGUIAR, Fernando, "The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) 1879-1988. From republican to liberal socialism", *Documento de Trabajo. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía*, nº 1906, (2006).

ÁGUILA, Juan José del, *El TOP: la represión de la libertad (1963-1977)*, Barcelona, Planeta, 2001.

ÁGUILA, Rafael del (coord.), *Los intelectuales y la política*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2003.

AGUILAR, Miguel Ángel y CHAMORRO, Eduardo, *Felipe González. Perfil humano y político*, Madrid, Cambio 16, 1977.

AGUILAR, Paloma, "La amnesia y la memoria. Las movilizaciones por la amnistía en la transición a la democracia" en PÉREZ LEDESMA, Manuel y CRUZ, Rafael (eds.), *Cultura y movilización en la España contemporánea*, Madrid, Alianza, 1998, pp. 327-357.

- "Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo en la democracia española: en ARÓSTEGUI, Julio y GODICHEAU, François (eds.), *Guerra civil: Mito y Memoria*, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 245-293.

- *Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada*, Madrid, Alianza, 2008.

AGUILAR, Salvador (dir.), *Sindicalisme i canvi social a Espanya, 1976-1988*, VI vols., Barcelona, Fundació Bofill / Fundació Volkswagen, 1991.

- ROCA, Jordi, *14-D: economía política de huelga*, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1989, vol. IV.

AGUILERA IZQUIERDO, Raquel, "El principio de «causalidad» en la contratación temporal", *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 33, (2001), pp. 99-122.

- BARRIOS BAUDOR, Guillermo y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Yolanda, *Protección social complementaria*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid / Facultad de Derecho, 2003.

AGUIRRE, José Antonio, *La política económica de la transición española, 1975-1980*, Madrid, Unión Editorial, 1981.

AGUIRRE, Mariano, "La situación actual revela una crisis de representación política. Entrevista a Ignacio Ramonet", *Revista Internacional de Filosofía Política*, nº 12, (1998), p. 177-183.

AGULLÓ TOMÁS, Esteban, *Jóvenes, trabajo e identidad*, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1997.

- OVEJERO BERNAL, Anastasio (coords.), *Trabajo, individuo y sociedad: perspectivas psicológicas sobre el futuro del trabajo*, Madrid, Pirámide, 2001.

- "Entre la precariedad laboral y la exclusión social: los otros trabajos, los otros trabajadores" en id. y OVEJERO BERNAL, Anastasio (coords.), *Trabajo, individuo y sociedad: perspectivas psicológicas sobre el futuro del trabajo*, Madrid, Pirámide, 2001, pp. 95-104.

AGUINAGA ROUSTAN, Josune, ANDRÉU ABELA, Jaime, CACHÓN, Lorenzo, COMAS ARNAU, Domingo, LÓPEZ BLASCO, Andreu y NAVARRETE MORENO, Lorenzo, *Informe de Juventud de España 2004*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2005.

AINAUD, Josep, *Ministros catalanes en Madrid*, Barcelona, Planeta, 1996.

ALANÓN, Ángel y GÓMEZ, Miguel, "Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas", *Papeles de Trabajo de Institutos de Estudios Fiscales*, nº 3, (2003).

ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y MIRÓN HERNÁNDEZ, Mª del Mar (coords.), *El trabajo ante el cambio de siglo: un tratamiento multidisciplinar (aspectos laborales, fiscales, penales y procesales)*, Madrid, Marcial Pons, 2000.

ALBA, Víctor, *Historia Social de la Juventud*, Barcelona, Plaza & Janés, 1979.

ALBA RAMÍREZ, Alfonso, "Labor market effects of fixed-term employment contracts in Spain", *Working Papers. Universidad Carlos III*, nº 96-60, (1996).

- ÁLVAREZ LLORENTE, Gema y PAGÁN RODRÍGUEZ, Ricardo, *Parados de larga duración: ¿cuántos son, quiénes son, qué tipo de empleo buscan y cuánto tardan en encontrar trabajo?* Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999.

ALBARRACÍN, Jesús, *Las tendencias básicas de la población, el empleo y el paro en el periodo, 1964 a 1980*, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1982.

- *La onda larga del capitalismo español*, Madrid, Colegio de Economistas, 1987.
- ARTOLA, Concha, “El crecimiento de los salarios y el deslizamiento salarial en el período 1981 a 1988”, *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 9001, (1990).
- *La economía del mercado*, Madrid, Trotta, 1991.
- (ed.), *Reflexiones sobre política económica*, Madrid, Editorial Popular, 1991.
- “La extracción del excedente y el proceso de acumulación” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 315-348.
- [et al.], *La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los ochenta*, Madrid / Barcelona, Icaria / Instituto Sindical de Estudios, 1993.
- “Ideología, errores y malas intenciones” en id. [et al.], *La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los ochenta*, Madrid / Barcelona, Icaria / Instituto Sindical de Estudios, 1993, pp. 21-53.
- “El fundamento empírico de las repercusiones del crecimiento de los salarios sobre el empleo” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, vol. III, pp. 715-722.

ALBENTOSA, Luis, “Las políticas de ajuste y la planificación”, *Economía Industrial*, nº 232, (1983), pp. 65-72.

- “La política de ajuste aplazada: reconversión industrial”, *Información Comercial Española*, nº 617-618, (1985), pp. 175-192.

ALBERDI, Cristina, *El poder es cosa de hombres*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2001.

ALBEROLA, Enrique, “La europeización de la política macroeconómica” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del sistema político español*, Madrid, Istmo, 2001, pp. 329-350.

ALBI IBÁÑEZ, Emilio (coord.), *La Hacienda Pública en la Democracia: estudios en homenaje al profesor Enrique Fuentes Quintana*, Barcelona, Ariel, 1990.

- “Elusión y evasión fiscales”, *Hacienda Pública Española*, nº 2, (1992), pp. 251-263.
- GARCÍA ARIZNAVARRETA, José Luis, *Sistema fiscal española*, 12ª ed., Barcelona, Ariel, 1997.

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César, *Sistema tributario español y comparado*, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1992.

- *El Impuesto sobre el Valor Añadido: análisis y comentarios*, Madrid, Deusto, 1994.

ALBIOL MONTESINOS, Ignacio y BLASCO PELLICER, Ángel Antonio, *Desempleo y despido en la reforma laboral del Real Decreto-Ley 5/2002*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002.

ALBIZU, Manuel, *Análisis de la política económica española y de sus efectos en el período 1970-1980*, Barcelona, Hogar del Libro, 1984.

ALBROW, Martin, *The Global Age: State and Society Beyond Modernity*, Cambridge, Polity Press, 1996.

ALBURQUERQUE, Francisco, “Una crítica al estilo de crecimiento asociado al capital transnacional en la España actual, y orientaciones básicas para una política económica alternativa de desarrollo económico”, *Sistema*, nº 80-81, (1987), pp. 133-144.

ALBURQUERQUE, MATTOS, Carlos A. de y JORDÁN, Ricardo (eds.), *Revolución tecnológica y reestructuración productiva: Impactos y desafíos territoriales*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1993.

ALCAIDE, Carmen, “La nueva EPA”, *Economistas*, vol. XXIV, nº 108, (2006), pp. 225-227.

ALCAIDE CASTRO, Manuel y FLOREZ SABORIDO, Ignacio, *Mercado de trabajo, reclutamiento y formación en España*, Madrid, Pirámide, 1996.

ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, “Distribución personal de la renta española en 1980”, *Hacienda Pública Española*, n° 85, (1983), pp. 485-509.

- “El comportamiento del gasto público en la OCDE y en España”, *Papeles de Economía Española*, n° 24, (1985), pp. 181-201.
- “Política de rentas”, *Información Comercial Española*, n° 676/677, (1989-1990), pp. 51-58.
- “Notas sobre la evolución del Ahorro Nacional Bruto en 1993”, *Cuadernos de Información Económica*, n° 79, (1993), pp. 31-42.
- “Distribución sectorial, personal y factorial de la renta” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 458-482.
- “Estadísticas de empleo: problemas de medición” en *El mercado de trabajo en España I. Realidades y posibilidades*. Dossier monográfico, *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, n° 1-2, (1999), pp. 321-342.

ÁLCALA, Ángel, *Estadística para relaciones laborales*, Salamanca, Hespérides [1999].

ALCAÑIZ MOSCARDÓ, Mercedes, *Cambio Social*, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I [2006].

ALCOVER IBÁÑEZ, Norberto, *España, 1982-1995: de la fascinación al quebranto*, Madrid, PPC, 1995.

ALDUNATE, Oscar y HEREDIA, Iván (coords.), *I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC [1º, 2007, Zaragoza]*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2008.

ALFARO VARGAS, Roy y CRUZ RODRÍGUEZ, Omar, “Teoría del conflicto social y posmodernidad”, *Revista de Ciencias Sociales*, n° 128-129, (2010), pp. 63-70.

ALFAYA, Javier y SARTORIUS, Nicolás, *La memoria insumisa: sobre la Dictadura de Franco*, Madrid, Espasa, 1999. Barcelona, Crítica, 2002.

ALLEN, John J., “¿Hacia una economía postindustrial?”, *Zona Abierta*, n° 65-66, (1993), pp. 47-102.

ALLERBBECK, Klaus y ROSEN MAYR, Leopold, *Introducción a la sociología a la juventud*, Madrid, Buenos Aires, Kapelusz, 1979.

ALLONA ALBERICH, Mª Dolores “Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración”, *Índice*, n° 36, (2009), pp. 12-14.

ALMAZÁN LLORENTE, Alejandro, *Análisis estadístico para la investigación social*, Madrid, Garceta / UNED, 2011.

ALMENARA, Vicente, *Los servicios de inteligencia en España: de Carrero Blanco a Manglano*, Córdoba, Arcopress, 2010.

ALMOND, Gabriel A. y VERBA, Sidney, *La Cultura Cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones*, Madrid, Euroamérica, 1970.

ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso [presidente Comité Organizador] [et al.], *Cultura y civilizaciones: III Congreso de la Historia Contemporánea [3º, 1996, Valladolid]*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1998.

ALMUNIA, Joaquín, *Memorias políticas*, Madrid, Aguilar, 2001.

- *Memorias políticas*, Madrid, Suma de Letras, 2002.
- *Los puntos negros del PP*, Madrid, Aguilar, 2004.

ALONSO, Javier, GALINDO, Miguel Ángel y SOSVILLA-RIVERO, Simón, “Convergence in social protection benefits across EU countries”, *Documentos de Trabajo. FEDEA*, n° 97-03, (1997).

ALONSO, Luis Enrique, *Historia del consumo en España: una aproximación a sus orígenes y primer desarrollo*, Barcelona, Debate, 1994.

- “¿El fin del trabajo o el trabajo sin fin?: Una revisión crítica de las tesis de Jeremy Rifkin”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, n° 6, (1998), pp. 13-34.

- “Conflicto laboral y cambio social” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 403-423.
 - *Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial*, Madrid, Trotta, 1999.
 - *Trabajo y posmodernidad: el empleo débil*, Madrid, Alianza, 2000.
 - FERNÁNDEZ Rodríguez, Carlos J., “Uso del trabajo y formas de gobernabilidad: la precariedad como herramienta disciplinaria” en CRESPO, Eduardo, PRIETO, Carlos y SERRANO, Amparo (coords.), *Trabajo, subjetividad y ciudadanía: paradojas del empleo en una sociedad en transformación*, Madrid, Editorial Complutense / Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009, pp. 229-258.
- ALONSO BORREGO, César y ALBA RAMÍREZ, Alfonso, “Tipo de contrato y empleo en el ciclo económico, 1987-1996”, *Papeles de Economía Española*, nº 72, (1997), pp. 231-249.
- ALONSO-CASTRILLO, Silvia, *La apuesta del centro: historia de la UCD*, Madrid, Alianza, 1996.
- ALONSO GONZÁLEZ Pablo, *La deuda pública: cien preguntas clave y sus respuestas*, Madrid, Dykinson, 1997.
- ALONSO OLEA, Eduardo J., “La federalización de una Hacienda centralista en un país no federal: España, 1845-2008”, *Economía*, vol. XXXII, nº 46, (2009), pp. 9-44.
- ALONSO OLEA, Manuel, *Derecho del Trabajo*. Madrid, Edit. Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección Publicaciones, 1978.
- [et al.], *Sindicatos y relaciones colectivas de trabajo*, Murcia, Ilustre Colegio de Abogados, 1978.
 - “Libertad sindical y derecho de sindicación” en id. [et al.], *Sindicatos y relaciones colectivas de trabajo*, Murcia, Ilustre Colegio de Abogados, 1978, pp. 9-31.
 - “Jurisprudencia reciente sobre huelga y amnistía laboral”, *Civitas*, nº 1, (1980), pp. 95-100.
 - *De la servidumbre al contrato de trabajo*, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1987.
 - [et al.], *España y la Unión Europea: las consecuencias del Tratado de Maastricht*, Madrid, Círculo de Lectores / Plaza & Janés, 1992.
 - “A propósito del proyecto caducado de ley de huelga”, *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, vol. XLV, nº 70, (1993), pp. 413-448.
 - ALONSO GARCÍA, Rosa Mª, *Derecho procesal del trabajo*, 9ª ed., Madrid, Civitas Thomson, 1997.
- ALTED, Alicia (dir.), *Archivo oral del sindicalismo socialista*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero / Ministerio de Presidencia, 2009 [CD-ROM].
- AROCA MOHEDANO, Manuela y COLLADO JIMÉNEZ, Juan Carlos (coords.), *El sindicalismo socialista español: una aproximación oral a la historia de UGT (1931-1975)*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2010.
- ALTERI, Luca y RAFFINI, Luca, “Trabajadores precario, ¿ciudadanos precarios?”, *Sistema*, nº 197-198, (2007), pp. 43-58.
- ALTUZARRA, A., “Cotizaciones sociales, coste laboral y competitividad en la economía española”, *Cuadernos Europeos de Deusto*, nº 17, (1997), pp. 11-38.
- ALUJAS RUIZ, Joan Antoni, *Políticas activas de mercado de trabajo en España (1985-2000)*, Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, 2002.
- *Políticas activas de mercado de trabajo en España: situación en el contexto europeo*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003.
- ALVARADO PLANAS, Javier (coord.), *Poder, economía, clientelismo*, Madrid, Marcial Pons, 1997.
- ÁLVAREZ, Nacho [et al.], *Ajuste y salario: las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2009.

ÁLVAREZ, Enrique y CALLEJA, Ángel, “Privatizaciones y el sistema de acción especial («golden share»)", *Economistas*, vol. XIII, nº 13, (1995), pp. 44-53.

ÁLVAREZ ALEDO, Carlos, *El impacto de la contratación temporal sobre el sistema productivo español. Relaciones de segmentación laboral y productiva*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1995.

- [et al.], *La distribución funcional y personal de la renta en España: un análisis de sus relaciones*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996.

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, José Luis, *Los comportamientos económicos de los españoles: consumo y ahorro*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999.

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Florentina, “Indicadores sociales de la mujer en el área de empleo. Fuentes estadísticas para su elaboración” en INSTITUTO DE LA MUJER, *Indicadores sociales para la mujer: ponencias presentadas en el seminario ‘Indicadores Sociales sobre la Situación de la Mujer’*, Madrid, Instituto de la Mujer, 1993, pp. 9-24.

ÁLVAREZ CORBACHO, Xoaquín, MONASTERIO ESCUDERO, Carlos y SÁNCHEZ PANDIELLO, Javier, *Déficit y deuda pública en las haciendas territoriales españolas*, Santiago de Compostela, Fundación Caixa Galicia, 1998.

ÁLVAREZ CUESTA, Henar, *La precariedad laboral: análisis y propuestas de solución*, Albacete, Bomarzo, 2008.

ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago, PRIETO RODRÍGUEZ, Juan y ROMERO JORDÁN, Desiderio, “Principales rasgos de la evolución del gasto público en España en el período 1975-2003” en id. y SALINAS JIMÉNEZ, Javier (coords.), *El gasto público en la democracia: estudio en el XXV aniversario de la Constitución española de 1978*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2003, pp. 47-75.

- SALINAS JIMÉNEZ, Javier (coords.), *El gasto público en la democracia: estudio en el XXV aniversario de la Constitución española de 1978*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2003.

ÁLVAREZ GARCÍA-BERNANDO, Ángeles, *Análisis estructural de las elecciones de 1982 en la prensa nacional española*, II vols., Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1986.

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, M^a Rosario y AZOFRA, M^a José, *Economía y juventud*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1999.

ÁLVAREZ JUNCO, José y PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Historia del movimiento obrero ¿Una segunda ruptura?”, *Revista de Occidente*, nº 12, (1982), pp. 19-42.

- “Movimientos sociales en España: del modelo tradicional a la modernidad post-franquista” en LARAÑA, Enrique y GUSFIELD, Joseph (eds.), *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994, pp. 413-442.

ÁLVAREZ MIRANDA, Berta, *El sur de Europa y la adhesión a la Comunidad. Los debates políticos*, Madrid, Siglo XXI / Centro de Investigaciones Sociológicas, 1996.

- [et al.], *Dilemas del estado de bienestar*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1996.

ÁLVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y mañana del 14-D*, Madrid, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 1990.

ÁLVAREZ-URÍA RICO, Fernando, “Regreso a Bretton Woods: de cómo la «ciencia económica» se desvinculó de la «economía política»”, *Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura*, nº 83-84, (2008), pp. 13-20.

ÁLVAREZ VILLAMARÍN, José Carlos y GAGO GONZÁLEZ, Alberto “Hechos y tendencias de la reforma fiscal en los países de la OCDE (1980-1990)”, *Hacienda Pública Española*, nº 134, (1995), pp. 73-91.

ÁLVARO ESTRAMIANA, José Luis, *Desempleo y bienestar psicológico*, Madrid, Siglo XXI, 1992.

ÁLVARO PAGE, Mariano, *Los usos del tiempo como indicadores de la discriminación entre géneros*, Madrid, Instituto de la Mujer, 1996.

ÁVILA CANO, Antonio J., SÁNCHEZ MALDONADO, José y AVILÉS ZUGASTI, C. Alicia, *Economía irregular y evasión fiscal: análisis económico y aplicaciones regionales a la economía española*, Málaga, Analistas Económicos de Andalucía, 1997.

ALVIRA MARTÍN, Francisco y GARCÍA LÓPEZ, Jorge, “La crisis económica: actitudes de los consumidores y empresarios”, *Papeles de Economía Española*, nº 2, (1980), pp. 99-133.

- “Los españoles después de la reforma fiscal”, *Hacienda Pública Española*, nº 72, (1981), pp. 243-258.

CANTERAS MURILLO, Andrés, *Delincuencia y marginación juvenil*, vol. VII, dentro de ZARRAGA, José Luis (dir.), *Informe Juventud de España 1985. La inserción de los jóvenes en la sociedad*, VII vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 1985.

- CANTERAS MURILLO, Andrés, *El suicidio juvenil*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1997.

ALZAGA RUIZ, Icíar, *Contratación laboral temporal: un estudio jurisprudencial*, Madrid, EDESA, 2000.

AMABLE, Marcelino, BENACH, Joan y GONZÁLEZ, S., “La precariedad laboral y su repercusión sobre la salud; conceptos y resultados preliminares de un estudio multimétodos”, *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, vol. IV, nº 4, (2001), pp. 169-184.

AMALIBIA, Jesús M^a, *El Barbero de Filesa*, Madrid, Grupo Libro 88, 1993.

AMANDO, Miguel de, *España oculta: la economía sumergida*, Madrid, Espasa Calpe, 1988.

AMATE FORTES, Ignacio y GUARNIDO RUEDA, Almudena, *Factores determinantes del desarrollo económico y social*, Málaga, Analistas Económicos de Andalucía, 2011.

AMELANG, James, “En estado frágil” en *Formas de hacer historia Social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp. 131-138.

AMIN, Samir [et al.], *Crisis financiera, económica, sistémica*, Madrid, Maia, 2010.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, *España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista*, Madrid, 2005 [www.es.amnesty.org].

- *30 años de Amnistía Internacional en España*, Madrid, Amnistía Internacional, 2008.

AMSTRONG, Philip, GLYNN, Andrew y HARRISON, John, *Capitalism since World War II. The Making and Breaking of the Long Boom*, Oxford, Basil Blackwell, 1991.

AMUEDO-DORANTES, Catalina, “Work transitions into and out of temporary employments in a Segmented Market: Evidence from Spain”, *Industrial and Labour Relations Review*, vol. LIII, nº 2, (2000) pp. 309-325.

AMURRIO, Roberto, “Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS)”, *Cuadernos de Acción Social*, nº 13, (1986), pp. 15-18.

ANALÍTICA S.L. (dir.), *Las desigualdades en España. Síntesis estadística*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1995.

ANDERSEN, Svein S. y ELIASSEN, Kjell A. (eds.), *Making policy in Europe: complex policy-making*, London, Sage Publications, 1993.

ANDERSON, Benedict R. O’G., *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*, New York / London, Verso, 1994 [1991].

ANDERSON, Perry, “The Antinomies of Antonio Gramsci”, *New Left Review*, nº 100, (1976), pp. 5-78.

- *Las antinomias de Antonio Gramsci*, Barcelona, Fontana, 1978.
- *Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson*, Madrid, Siglo XXI, 1985.
- *Tras las huellas del materialismo histórico*, Madrid, Siglo XXI, 1986.
- *The Origins of Postmodernity*, London, Verso, 1998.
- *Los orígenes de la posmodernidad*, Barcelona, Anagrama, 2000.
- “Neoliberalismo: un balance provisorio” en SADER, Emir y GENTILI, Pablo (comps.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, 2ª ed., Buenos Aires, CLACSO, 2003 [bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf].

ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, *El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político*, Madrid, Siglo XXI, 2012.

- “Con su propia voz. Los militantes de base ante el cambio ideológico del PCE y el PSOE en la etapa central de la transición española” en *Resistencia, militancia política, transición*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 73, (2012), pp. 123-143.

ANDRÉS ORIZO, Francisco, GÓMEZ-REINO, Manuel, GONZÁLEZ BLASCO, Pedro, LINZ, Juan José y TOHARIA, José Juan, *Juventud española 1984*, Madrid, SM, 1985.

- *Los nuevos valores de los españoles: España en la encuesta europea de valores*, Madrid, Fundación Santa María / SM, 1991.
- *Sistema de valores en la España de los 90*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2001.
- *Dinámica intergeneracional en el sistema de valores españoles*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995.

ANDREANO, Ralph L., *The New Economic History. Recent Papers on Methodology*, New York, John Wiley & Sons, 1970.

ANDRÉS DOMINGO, Javier, MOLINAS, César y TAGUAS, David, “Convergencia, pacto social y política fiscal: una evaluación macroeconómica”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. I, nº 2, (1993), pp. 5-23.

- DOMÉNECH, Rafael, *La convergencia real con Europa*, [Madrid], Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Planificación, 1995
- y id., TAGUAS, David, “Desempleo, ciclo económico y participación de las rentas de trabajo en la economía española”, *Documento de Trabajo. Ministerio de Economía y Hacienda*, nº 96001, (1996).

ANDUIZA PEREA, Eva, *Actitudes, valores y comportamientos políticos de los jóvenes españoles*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2001.

ANES, Gonzalo (ed.), *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1999.

ANGUITA, Julio, “España ante la Unión Europea”, *Utopías: Nuestra Bandera*, nº 168, (1996), pp. 15-28.

- *Corazón rojo: la vida después de un infarto*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005.

ANISI, David, “Crisis y política económica” en ALBARRACÓN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política económica*, Madrid, Editorial Popular, 1990, pp. 15-45.

- *Modelos económicos: una interpretación de la macroeconomía*, Madrid, Alianza, 1991.
- *Creadores de escasez: del bienestar al miedo*, Madrid, Alianza, 1995.
- [et al.], *Análisis económico de la exclusión social*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003.
- *Cuentos Económicos*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2005.
- “Economía: la pretensión de una ciencia”, *Revista de Economía Crítica*, nº 7, (2009), pp. 139-152.

ANTHONY, Peter D., *The Ideology of Work*, London, Routledge, 2001 [1977].

ANTÓN, Antonio, *Precariedad laboral e identidades juveniles*, Madrid, GPS, 2006.

ANTUNES, Ricardo, “La nueva morfología del trabajo y sus principales tendencias: informalidad, infoproletario, (in)materialidad y valor”, *Sociología del Trabajo*, nº 74, (2012), pp. 47-68.

- “La centralidad del trabajo hoy”, *Herramienta. Debate y crítica marxista*, nº 8, (1998).

APARICIO GARCÍA, Santiago, *El liderazgo político en la España contemporánea: el caso del PSOE (1974-2000)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2002.

APARICIO TOVAR, Joaquín, *Introducción al derecho social de la Unión Europea*, Albacete, Bomarzo, 2005.

- (dir.), *Diálogos sobre política sindical*, Madrid, GPS-Madrid, 2008.
- ARAMBERRI, Julio R., “El encanto y sus encrucijadas”, *Leviatán*, nº 10, (1982), pp. 7-12.
- ARAGÓN, Jorge y PARRÁ, Tomás, “Reflexiones sobre el Libro Blanco de la Reindustrialización”, *Economía Industrial*, nº 232, (1983), pp. 81-88.
- GUTIÉRREZ BENITO, Eduardo, “La negociación colectiva y la formación de los salarios en España”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, nº 9, (1996), pp. 77-99.
- ARAGONESES, Alfons, “El derecho bajo el franquismo. Transformaciones del sistema jurídico español (1936-1978)” en CAPELLÀ, Margalida y GINARD, David (coords.), *Represión política, justicia y reparación: la memoria histórica en perspectiva jurídica*, Palma (de Mallorca), Documenta Balear, 2009, pp. 123-159
- ARAMAYO, José Luis, DIOS MURO, Juan de, TOHARIA, Luis y URIEL JIMÉNEZ, Ezequiel, “La Encuesta de Población Activa y la Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, vol. III, pp. 111-142.
- ARAMENDI SÁNCHEZ, José Pablo, “La discriminación de los y las jóvenes en el trabajo” en *Discriminaciones diversas en las personas jóvenes*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 89, (2010), pp. 79-99.
- ARANDA PÉREZ, Francisco José, SANZ CAMAÑES, Porfirio y FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco (coords.), *La historia en una nueva frontera = History in a new frontier*, Cuenca, Servicio de Publicaciones de Castilla-La Mancha, 2000.
- ARANGO FERNÁNDEZ, Jesús, *La protección por desempleo en España*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1999.
- VALDAVIDA CASTAÑO, Emiliano, “Siniestralidad laboral y crecimiento económico en España” en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA APLICADA (ed.), *Anales de Economía Aplicada. XIV Reunión ASEPELT-España. Oviedo, 22 y 23 de junio de 2000*, [CD-ROM].
- ARANZADI, José Claudio, “La política de desinversiones en el INI”, *Papeles de Economía Española*, nº 38, (1989), pp. 258-261.
- “Una nota sobre ajuste y reindustrialización”, *Papeles de Economía Española*, nº 15, (1983), pp.317-325 [con Oscar Fanjul y Fernando Maravall].
- ARCO BLANCO, Miguel Ángel del, “Un paso más allá de la historia cultural: los *cultural studies*” en ORTEGA LÓPEZ, Teresa Mª (coord.), *Por una historia global: el debate historiográfico en los últimos tiempos*, Granada, Universidad de Granada / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 259-289.
- ARCOS VARGAS, Mª Cruz, *De la Comunidad a la Unión Europea: El Tratado de Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992*, Sevilla, UNED-Centro Asociado de Sevilla, 1992.
- ARRELLANO GONZÁLEZ, Manuel, BOVER, Olympia y BENTOLILA, Samuel, “Duración de desempleo, duración de las prestaciones y ciclo económico”, *Estudios Económicos*, nº 57, (1996), pp. 1-75.
- ARICÓ, José, MURMIS, Miguel y SCARON, Pedro, “El Marx desconocido” en MARX, Karl, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Borrador 1857-1858*, 13ª ed., México, Siglo XXI, 1984.
- ARGANDOÑA RAMÍZ, Antonio y GARCÍA-DURÁN, José Antonio, *La economía española en cifras*, Barcelona, Orbis, 1985.
- “La política monetaria española, 1973-1984”, *Información Comercial Española*, nº 617-618, (1985), pp. 67-80.
- *Ensayos sobre política monetaria española*, Barcelona, Orbis, 1987.
- “Tres años de control de los activos líquidos en manos del público”, *Papeles de Economía Española*, nº 32, (1987), pp. 46-62.
- GÁMEZ AMIAN, Consuelo y MOCHÓN MORCILLO, Francisco, *Macroeconomía avanzada*, II vols., Madrid, McGraw-Hill, 1997-1999.

ARGIMON, Isabel, “Técnicas de medición de la evasión fiscal”, *De Economía Pública*, nº 5, (1989), pp. 43-58.

ARIJA, José Manuel, *Nicolás Redondo*, Madrid, Cambio 16, 1977.

ARIÑO ORTIZ, Gaspar (dir.), *Privatizaciones y liberalizaciones en España: balance y resultados (1996-2003)*, II vols., Granada, Comares, 2004.

- *Empresa pública, empresa privada, empresa de interés general: lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender*, Navarra, Thomson Aranzadi, 2007.

ARÍSTEGUI, Javier, “Política monetaria: de la gestión independiente a la Unión Monetaria Europea” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 549-577.

ARMADA, Alfonso, *Al servicio de la Corona*, Barcelona, Planeta, 1983.

ARMARIO, Diego, *El triángulo: El PSOE durante la transición*, Valencia, Fernando Torres, 1981.

ARMAS MARCELO, Juan José, *Los años en que fuimos Marilyn*, 3ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 1995.

ARNES, Sara (ed.), *The myth of generational conflict: the family and state in ageing societies*, London, Routledge, 1999.

ARÓSTEGUI, Julio, “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia” en id. (ed.), *Violencia y política en España*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 13, (1994), pp. 17-56.

- *La investigación histórica: Teoría y método*, Barcelona, Crítica, 1995.
- “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España siglo XX (1939-1996)*, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 243-363.
- *La historia vivida: sobre la historia del presente*, Madrid, Alianza, 2004.
- *Por qué el 18 de julio: y después*, Barcelona, Flor del Viento, 2006.
- GODICHEAU, François (eds.), *Guerra civil: Mito y Memoria*, Madrid, Marcial Pons, 2006.
- “La Transición a la democracia, «matriz» de nuestro tiempo reciente” en QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael (coord.), *Historia de la Transición en España: los inicios del proceso democratizador*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 31-43.
- SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de Lara, diez años después. La huella de un legado*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 30 (2008), pp. 199-226.
- GÁLVEZ BIESCA, Sergio (eds.), *Generaciones y memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria*, Valencia, Universitat de València, 2010.
- (coord.), *Franco: la represión como sistema*, Barcelona, Flor del Viento, 2012.

ARASSANZ DÍAZ, Juan y LÓPEZ ANDREU, Martí, “La concertación social en España (1976-2004): análisis de la construcción socio-histórica de los actores sociales”, *Relaciones Laborales, formación y fiscalidad*. Dossier monográfico, *Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo*, nº 6, (2005), pp. 183-200.

ARAYA GOMÉZ, Rodrigo, “Asegurar el pan y la libertad: la postura de Comisiones Obreras ante el Pacto de la Moncloa”, *Historia del Presente*, nº 14, (2009), pp. 151-164.

- “«Quebrando la herencia del franquismo». Respuestas sindicales ante los Pactos de la Moncloa” en FUENTES NAVARRO, Mª Candelaria, CONTRERAS BECERRA, Javier y LÓPEZ CHAVES, Pablo (eds.), *II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea [2º, 2009, Granada]*, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2010 [CD-ROM].

ARNAÍZ TOVAR, Gonzalo y FERRARI HERRERO, Ignacio, “Impuesto sobre sucesiones: datos para un informe”, *Papeles de Economía Española*, nº 31-31, (1987), pp. 249-264.

ARRESE, Ángel, “Prensa económica y financiera en España: apuntes para una historia reciente” en FERNÁNDEZ SANZ, Juan José (coord.), *Prensa especializada actual: doce calas*, Madrid, McGraw Hill, 2008, pp. 1-36.

ARRIBA, Ana, CALZADA, Inés y PINO, Eloísa del, *Las actitudes de los españoles ante el Estado del Bienestar*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006.

ARRIBAS LEÓN, Mónica, *El Impuesto sobre el Patrimonio*, Granada, Comares, 2007.

ARRIBAS MACHO, José M^a, “El modelo estadístico desde la perspectiva cualitativa”, *Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales*, nº 1, (1998), pp. 85-96.

ARRIGHI, Giovanni, *El largo siglo XX: Dinero y poder en los orígenes de nuestra época*, Madrid, Akal, 1999.

ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, *L'uomo precario. Nel disordine globale*, Milano, Jaca Book, 2003.

- *Flexibles y precarios. La opresión del trabajo en el nuevo capitalismo europeo*, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo, 2005.

ARRIZABALO MONTORO, Xavier (ed.), *Crisis y ajuste en la economía mundial: las implicaciones y significado de las políticas del FMI y del BM*, Madrid, Síntesis, 1997.

- “El ajuste en la Unión Europea durante los años noventa: los acuerdos de Maastricht” en id. (ed.), *Crisis y ajuste en la economía mundial: las implicaciones y significado de las políticas del FMI y del BM*, Madrid, Síntesis, 1997, pp. 137-180.

ARTOLA, Concha, ARGIMÓN, Isabel y GONZÁLEZ-RÁRAMO, José Manuel, “Empresa pública y empresa privada: titularidad y eficiencia”, *Moneda y Crédito*, nº 209, (1999), pp. 45-93.

ARUFE VARELA, Alberto, *Estudio comparado de la carrera administrativa de los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Europa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007.

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO, *Informe de siniestralidad laboral. Propuestas para su reducción. Enero 2001*, Madrid, Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, 2001.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA APLICADA (ed.), *Anales de Economía Aplicada. XIV Reunión ASEPELT-España*, Oviedo, 22 y 23 de junio de 2000.

ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE, *España a las urnas*, Madrid, Asociación Independiente, 1979.

ASOCIACIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA Y DE LA JOVEN GUARDIA ROJA, *PTE, la lucha por la ruptura democrática en la Transición*, Madrid, Asociación por la Memoria Histórica del Partido del Trabajo de España y de la Joven Guardia, 2010.

ASENJO, Milagros, *El camaleón. Educación: la gran estafa socialista*, Barcelona, Tibidabo, 1992.

ASTORKIA, José M^a, “Evolución de la abstención electoral en España, 1976-1991” en CASTILLO, Pilar del (ed.), *Comportamiento político y electoral*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995, pp. 3-18.

ASTUDILLO, Javier, *Los recursos del socialismo: las cambiantes relaciones entre el PSOE y la UGT (1982-1993)*, Tesis Doctoral, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 1998.

- “Without Unions, but Socialist: The Spanish Socialist Party and its divorce from its unions confederation”, *Politics & Society*, vol. XXIX, nº 2, (2001), pp. 271-294.
- “La trampa partidista de la UGT: de la relación solidaria con el PSOE a la unidad de acción sindical con CCOO”, *Revista Española de Ciencia Política*, nº 11, (2004), pp. 73-101.

ATIENZA, Julián y POMBO, M^a Nieves, *España y los acontecimientos de 1992*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992.

ATTARD, Emilio, *Vida y muerte de UCD*, Barcelona, Planeta, 1983.

ATTIAS-DONFUT, Claudine, *Sociologie des générations. L'empreinte du temps*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991.

- (dir.), *Les solidarités entre générations: vieillesse, familles, État: ouvrage collectif*, Paris, Nathan, 1995.
- AUGUSTÍN PUERTA, Mercedes, *Feminismo, identidad personal y lucha colectiva (análisis del movimiento feminista español en los años 1975 a 1985)*, Granada, Universidad de Granada, 2003.
- AURIOLES MARTÍN, Adolfo Juan y MOCHÓN MORCILLO, Francisco, “La industria andaluza: situación actual y perspectivas” en *Economía Industrial*, nº 263-164, (1988), pp. 17-25.
- AUTAIN, Clémentine, *Le Retour du peuple: de la classe ouvrière au précarat*, Paris, Stock, 2012.
- ÁVILA FRANCÉS, Juan [et al.], *Estado de bienestar y socialdemocracia. Ideas para el debate*, Madrid, Alianza, 2001.
- AVILÉS, Juan, “Veinticinco años después: memoria de la transición”, *Historia del Presente*, nº 1, (2002), pp. 88-97.
- (ed.), *Terrorismo en la España democrática*. Dossier monográfico *Historia del Presente*, nº 14, (2009).
- AYALA CANÓN, Luis, MARTÍNEZ, Rosa y RUIZ-HUERTA, Jesús, “La distribución de la renta en España en los años ochenta: una perspectiva comparada” en *I Simposio sobre igualdad y redistribución de la renta y la riqueza*, IX vols., Madrid, Fundación Argentaria, 1993, vol. II, pp. 101-136.
- ONRUBIA FERNÁNDEZ, Jorge y id., “Modelos de microsimulación: aplicaciones a partir del Panel de Declarantes por IRPF del Instituto de Estudios Fiscales”, *Cuadernos Económicos de ICE*, nº 68, (2004), pp. 111-138.
- AYERDI, Pedro Mª y TABERNA, Félix, *Juventud y empleo. Una aproximación descriptiva*, Madrid, Popular, 1991.
- AYUSO, Luis, “Protección social y sistemas de bienestar en la UE”, *Cuadernos Europeos*, nº 5, (2008).
- AZCUÉNAGA LINAZA, Luis Mª, *Accidentes laborales y enfermedades profesionales: análisis, riesgos y medidas preventivas*, Madrid, Fundación Confemetal, 2009.
- AZÓCAR, Oscar (coord.), *Fuerzas armadas, democracia y alternativas al neoliberalismo en América Latina*, Santiago de Chile, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz / Fundación Rosa Luxemburgo, 2005.
- BABIANO, José y MOSCOSO, Leopoldo, “Los conflictos sociales en fase depresiva ante la adopción de políticas de ajuste: El caso español”, *Zona Abierta*, nº 56 (1991), pp. 121- 173.
- “La conflictividad laboral en Madrid bajo el Franquismo (1962-1976)” en SOTO CARMONA, Álvaro (dir.), *Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical (Evolución Socio-Laboral de Madrid 1939-1991)*, Madrid, GPS, 1994, pp. 165-210.
- “Las peculiaridades del fordismo español”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, nº 3, (1993), pp. 77-94.
- MINGO, José Antonio de, “De la comisión de enlaces y jurados del metal a la Unión Sindical de Madrid: las comisiones obreras madrileñas durante el franquismo” en RUIZ, David (dir.), *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 191-214.
- *Emigrantes, cronómetros, y huelgas: un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977)*, Madrid, Fundación 1º de Mayo / Siglo XXI, 1995.
- “Argumentando, una vez más, sobre sí existe la clase obrera” en DELGADO, Santiago y VÉLEZ, Antonio J. (eds.), *El futuro del sindicalismo*, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1996, pp. 75-83.
- *Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958)*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.
- (ed.), *Del hogar a la huelga: trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007.
- FERNÁNDEZ ASPERILLA, *La patria en la maleta. Historia de la emigración española a Europa*, Madrid, Ediciones GPS / Fundación 1º de Mayo, 2009.

- (ed.), *Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana*, Madrid, Fundación 1º de Madrid / Ediciones GPS, 2010.
- “El poeta desaparecido, el juez depurado y el obrero invisible (tres perfiles de la llamada memoria histórica)” en FUNDACIÓN 1º DE MAYO, *2010 Anuario*, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2011, pp. 390-391.
- BACCINI, Alberto y GIANNETTI, Renato, *Climoetría*, Barcelona, Crítica, 1997.
- BACHMANN, Ingrid, “Estudio en la prensa económica: la contaminación del discurso periodístico”, *Cuadernos de Información*, nº 18, (2005).
- BADENES, Xavier, ETXEZARRETA Miren, GORDILLO, Iván [et al.], “La estrategia del capital”, *Seminari d’Economia Crítica TAIFA*, nº 8, (2011).
- BADOSA, Juan, “La adhesión de España a la CEE”, *Información Comercial Española*, nº 826, (2005), pp. 99-106.
- BAENA ALCÁZAR, Mariano, *Elites y conjuntos de poder en España (1939-1992): un estudio cuantitativo sobre el Parlamento, Gobierno y Administración y gran empresa*, Madrid, Tecnos, 1999.
- BAEZA, Ramón, ROCHA, Fernando y LLOPIS, Elvira S., “El trabajo decente en España 2011”, *Informes de la Fundación 1º de Mayo*, nº 41, (2011).
- BAGLIONI, Guido y CROUCH, Colin (comps.), *Las relaciones laborales en Europa. El desafío de la flexibilidad*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.
- BAIGES, Francesc, GONZÁLEZ, Enric y REIXACH, Jaume, *Banca catalana más que un banco, más que una crisis*, Barcelona, Plaza y Janes, 1985.
- BAIGES, Josep, MOLINAS, César y SEBASTIÁN, Miguel, *La economía española 1964-1985: datos, fuentes y análisis*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1987.
- BAIGORRI, Artemio y FERNÁNDEZ DÍAZ, Ramón, *Botellón: un conflicto posmoderno*, Barcelona, Icaria, 2004.
- BAIZÁN MUÑOZ, Pau, “La difícil integración de los jóvenes en la edad adulta”, *Documento de Trabajo de la Fundación Alternativas*, nº 33, (2003).
- BAJO RUBIO, Óscar, “El marco de la política fiscal en España: sostenibilidad del déficit público e implicaciones de la UEM”, *Información Comercial Española*, nº 837, (2007), pp. 57-70,
- BAJOIT, Guy, *El cambio social: análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas*, Madrid, Siglo XXI, 2008.
- BALDWIN, Peter, *La política de solidaridad social: bases sociales del estado del bienestar europeo, 1875-1975*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.
- BALFOUR, Sebastián, *La dictadura, los trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988)*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1994.
- BALLABRIGA, Fernando C. y SEBASTIÁN, Miguel, “Déficit público y tipos de interés en España en la economía española”, *Documento de Trabajo. Servicios de Estudios del Banco de España*, nº 9220, (1992).
- BALLESTER, David, *Els Homes sense nom: l’exili i la clandestinitat de la UGT a Catalunya (1939-1976)*, Barcelona, Viena Edicions, 2003
- BALLESTEROS, Francesc, “Análisis comparativo de la evolución del programa económico del PSOE y la política económica del gobierno socialista”, *Papers ESADE. Estudios e investigaciones de los alumnos*, nº 9, (1996).
- BANACLOCHE PÉREZ-ROLDÁN, Julio, “¿Amnistía fiscal?”, *Impuestos*, vol. XIV, nº 1, (1998), pp. 9-24.
- BANCO DE ESPAÑA, *Política monetaria: El punto de vista del Banco de España*, Barcelona, Orbis, 1986.
- *Informe anual*, Madrid, Banco de España, 1983
- *Informe Anual*, Madrid, Banco de España, 1984.

- *Informe anual*, Madrid, Banco de España, 1985.
- BANCO MUNDIAL, *Informe del Desarrollo Mundial 1986*, Madrid, Tecnos, 1986.
- BANDRÉS, Eduardo, “Gasto público y estructuras del bienestar: el sistema de protección social” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 631-660.
- *Los efectos de los gastos sociales sobre la distribución de la renta en España*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1990.
- BANEGAS, Jesús, *La nueva economía en España: las TIC, la productividad y el crecimiento económico*, Madrid, Alianza, 2003.
- BAR, Antonio, “Contenido y dinámica de la estructura gubernamental en España”, *Revista de Derecho Político*, nº 29, (1989), pp. 37-114.
- “¿Normalidad o excepcionalidad?: Para una tipología del sistema de partidos español, 1977-1982”, *Sistema*, nº 65, (1985), pp. 3-38.
- BARATECH, Feliciano, *Banca Catalana (1959-1984). Toda la verdad*, Barcelona, Planeta, 1985.
- BARAS, Montserrat y BOTELLA, Joan, *El sistema electoral*, Madrid, Tecnos, 2009 [1996].
- BARBAGELATA, Héctor-Hugo, “El advenimiento del neoliberalismo y los posibles cambios estructurales del Derecho del Trabajo”, *Revista Española de Derecho del Trabajo*, nº 54, (1992), pp. 493-504.
- BARBERÁN, Miguel Ángel, “Redistribución y progresividad en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: un análisis con datos del panel”, *Hacienda Pública Española*, nº 177, (2006), pp. 25-55.
- BARCELÓ, Luis Vicente [et al.], *Organización económica de la agricultura española. Adaptación de la agricultura española a la normativa de la UE*, Valencia, Fundación Alfonso Martín Escudero, 1995.
- BÁRCENA MARTÍN, Elena, *Introducción a la estadística para las relaciones laborales*, Málaga, Ágora [2007].
- BARCIELA, Carlos Fernando, “Fraude fiscal y mercado negro durante el primer franquismo” en COMÍN, Francisco y ZAFRA, Juan (eds.), *El fraude fiscal en la Historia de España. Dossier monográfico Hacienda Pública Española*, nº I extra, (1994), pp. 367-381.
- BARCIELA, Fernando, *La otra historia del PSOE*, Madrid, Emiliano Escolar, 1981.
- BAREA, José y GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel (dirs.), *Pensiones y prestaciones por desempleo*, Bilbao, Fundación BBV, 1996.
- GONZÁLEZ-PÁRAMO, José y VELARDE, Juan (eds.), *Pensiones y prestaciones por desempleo*, 2ª ed., Bilbao, Fundación BBV, 1997.
- BARÓ, Ezequiel, “Cambios en la interdependencia entre sectores industriales y terciarios” en *Papeles de Economía Española*, nº 42, (1990), pp. 192-201.
- BARÓN, Enrique, *Federación de Partidos Socialistas*, Barcelona, Avance, 1976.
- ROLDÁN, Santiago, “Crisis económica: la respuesta socialista”, *Papeles de Economía Española*, nº 2, (1980), pp. 33-45.
- “El horizonte del 92 y la izquierda”, *Leviatán*, nº 36, (1989), pp. 21-32.
- BARRADA RODRÍGUEZ, Alfonso, *La protección social en la Unión Europea, de 1981 a 1994: con especial atención a la cobertura de la inactividad laboral*, Bilbao, Fundación Banco Bilbao Vizcaya, 1997.
- GONZALO GONZÁLEZ, Bernardo, *La financiación de la protección social en España: a propósito del Pacto de Toledo*, 2ª ed., Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.
- BARRERA DEL BARRIO, Carlos, *Historia política de la España reciente (1962-1996): tardofranquismo, transición y democracia*, Pamplona, Newbook, 1999.
- BARREIRO, Belén y SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio, “La europeización de la opinión pública española” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del sistema político español*, Madrid, Istmo, 2001, pp. 27-51.

BARRENETXEA, Igor, “Dejando atrás la oposición”, *Entelequia. Revista Interdisciplinar*, nº 2, (2006), pp. 303-304.

BARRIO ALONSO, Ángeles, “A propósito de la historia social, del movimiento obrero y los sindicatos” en RUEDA, Germán (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, Universidad de Cantabria, 1991, pp. 295-314.

- “Historia obrera en los noventa: Tradición y modernidad”, *Historia Social*, nº 37, (2000), pp. 143-160.
- “Clase obrera y movimiento obrero: ¿Dos compañeros inseparables?” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de Lara, diez años después. La huella de un legado*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 30 (2008), pp. 83-104.
- “Historia social y postsocial. ¿Un debate de ida y vuelta para la historia?” en CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo, FANDIÑO PÉREZ, Roberto y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Historia social, movimientos sociales y ciudadanía*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, pp. 61-84.
- HOYOS PUENTE, Jorge de, SAAVEDRA ARIAS, Rebeca (eds.), *Nuevos horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación*, Santander, Universidad de Cantabria, 2011.

BARRIONUEVO, José, *2001 días en Interior*, Barcelona, Ediciones Grupo Zeta, 1997.

BARROS, Carlos, “El retorno del sujeto social en la Historiografía española” en CASTILLO, Santiago y ORTIZ DE ORRUÑO, José M^a (coords.), *Estado, protesta y movimientos sociales: actas del III Congreso de Historia Social de España, Vitoria-Gasteiz, julio de 1997 [3º, 1997, Vitoria]*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 191-214.

BARTHELEMY, Philippe, “The macroeconomic estimates of the hidden economy: a critical analysis”, *Review of Income and Wealth*, vol. XXXIV, nº 2, (1988), pp. 183-208.

BARTOLANI, Sergio, *La evolución del Sistema Monetario Internacional*, Madrid, Pirámide, 1980.

BAUMAN, Zygmunt, *Liquid Modernity*, Cambridge, Polity Press / Blackwell Publishers Ltd., 2000

- *Community: Seeking Safety in a Insecure World*, Cambridge, Polity Press, 2001
- *Modernidad líquida*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- *Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil*, Madrid, Siglo XXI, 2003.

BAYONA FERNÁNDEZ, Gloria [et al.], *Actes del Congrés la transició de la dictadura franquista a la democràcia: Barcelona, 20, 21 i 22 d'octubre de 2005*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d'Estudis sobre les Epòques Franquista i Democràtica, 2005.

BAYLOS, Antonio, “Trabajo temporal y no discriminación”, *Relaciones Laborales*, vol. II, (1987), pp. 429-439.

- *Derecho de huelga y servicios esenciales*, Madrid, Tecnos, 1987.
- “Institucionalización sindical y prácticas neocorporativistas. El caso español: 1977-1987”, *Revista de Trabajo*, nº 91, (1988), pp. 9-21.
- [et al.], *Nuevas tecnologías y clase obrera*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1989.
- “Evolución de las formas de contratación precaria en España” en BAYLOS, Antonio [et al.], *Nuevas tecnologías y clase obrera*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1989, pp. 89-100.
- *Derecho del trabajo, modelo para armar*, Madrid, Trotta, 1991.
- “Experiencias y modelos de concertación social” en GUITTON, Christophe, REYNAUD, Emmanuèle y MARUANI, Margaret (coords.), *Debates sobre el empleo*, III vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991-1992, vol. III, pp. 177-198

- “Sistema de empresa y reforma del mercado de trabajo”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, nº 5, (1994), pp. 140-156.
- La intervención normativa del Estado en materia de relaciones colectivas” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999 [1991], pp. 289-301.
- “La «huida» del derecho del trabajo: tendencias y límites de la deslaboración” en ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y MIRÓN HERNÁNDEZ, Mª del Mar (coords.), *El trabajo ante el cambio de siglo: un tratamiento multidisciplinar (aspectos laborales, fiscales, penales y procesales)*, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 35-54.
- *Las relaciones laborales en España desde la Constitución hasta nuestros días (1978-2003)*, Madrid, Fundación Sindical de Estudios, 2003.
- BAYLOS, Antonio, “Mercado de Trabajo y Derecho de Trabajo: el caso español (1977-2007)” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio, *La clase trabajadora, después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 26/27 (2008), pp. 205-211.

BEA GONZÁLEZ, Eva Mª, GÓMEZ, Mª Carmen, INTXAUSTI, Mª José y FERREIRO APARICIO, Jesús, “Teoría Insider-Outsider y temporalidad en el mercado de trabajo español”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 51, (2004), pp. 31-54.

BECK, Ulrich, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Suhrkamp, Frankfurt and Main, 1986.

- *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*, Barcelona, Paidós, 1998.
- GIDDENS, Anthony y LASH, Scott, *Modernización reflexiva: política, tradición y estética en el orden social*, Madrid, Alianza, 1997.
- *Schöne neue Arbeitswelt*, Suhrkamp, Frankfurt and Main, 1999.
- *Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización*, Barcelona, Paidós, 2000.

BEL I QUERALT, Germá, *Privatización, desregulación y ¿competencia?* Madrid, Civitas, 1996.

- “Privatización en España, OPVs y premio bursátil: ¿aprendimos algo de la experiencia británica?”, *Hacienda Pública Española*, nº 144, (1998), pp. 3-15.
- “Los costes financieros de la privatización en España”, *Información Comercial Española*, nº 772, (1998), pp. 125-144.
- y COSTAS, Antón, “La privatización y sus motivaciones en España: de instrumento a política”, *Revista de Historia Industrial*, nº 19-20, (2001), pp. 105-132.
- CALZADA, Joan y FAGEDA, Xavier, “Liberalización y competencia en España: ¿dónde estamos?”, *Información Comercial Española*, nº 829, (2006), pp. 123-144.

BELL, Daniel, *El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social*, Madrid, Alianza, 1976.

- *El fin de las ideologías: sobre el agotamiento de las ideas políticas en los años cincuenta*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

BELL, David S. (ed.), *Democratic Politics in Spain: Spanish Politics after Franco*, London, St. Martin's Press, 1983.

- *The French Socialist Party. The emergence of a Party of Government*, London, Oxford University Press, 1984.

BELLO, Walden, BULLARD, Nicola y MALHOTRA, Kamal (eds.), *Global finance. New thinking on Regulating Capital Markets*, London, Zed Books, 2000.

BELLOCH, Santiago, *Interior. Los hechos clave de la Seguridad del Estado en el último cuarto de siglo*, Barcelona, Ediciones B, 1998.

BELTRÁN, Miguel, GARCÍA FERRANDO, Manuel, GONZÁLEZ-ANLEO, Juan, LÓPEZ PINTOR, Rafael y TOHARIA, José Juan, *Informe sociológico sobre la juventud española 1960/82*, Madrid, SM, 1984.

BELTRÁN FELIP, Reyes, “Las mujeres y el trabajo a tiempo parcial en España. Elementos para su análisis”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, nº 17, (2000), pp. 137-161.

BENACH, Joan, BENAVIDES, Fernando G., PLATT, Steve, DIEZ-ROUX, Ana y MUNTANER, Carles, “The Health-Damaging Potential of New Types of Flexible Employment: A challenge for Public Health Researchers”, *American Journal of Public Health*, vol. XC, nº 8, (2000), pp. 1316-1317.

BENEDICTO, Jorge y MORÁN, M^a Luz. *La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2002.

- y id. (eds.), *Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y construcción de ciudadanía entre los jóvenes*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2003.
- “Ciudadanos, ciudadanía y cultura democrática” en PÉREZ LEDESMA, Manuel (dir.), *De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 373-405.

BENEDICTO RODRÍGUEZ, Javier, *Charles Taylor: Identidad, comunidad y libertad*, Tesis Doctoral, Universitat de València, 2005.

BENEGAS, José M^a, “El Partido Socialista y el empleo juvenil”, *Economía y sociología del trabajo*, nº 1-2, (1988), pp. 83-85.

- *La razón socialista: cara abierta a los socialistas españoles*, 2ª ed., Barcelona, Planeta, 1990.
- “El fin de una etapa, el comienzo de un tiempo”, *Leviatán*, nº 40, (1990), pp. 5-14.
- *El socialismo de lo pequeño. Grandeza y humildad de un ideal*, Madrid, Temas de Hoy, 1997.

BENERÍA, Lourdes, “El debate inconcluso sobre el trabajo no remunerado”, *Papers*, nº 55, (1998), pp. 95-114 [también publicado en, *Revista Internacional del Trabajo*, nº 3, (1999), pp. 321-346].

BENEYTO, Pere, (ed.), *Afiliación sindical en Europa: modelos y estrategias*, II vols., Valencia, Germania, 2004.

- “La afiliación sindical en España: viejos tópicos y nuevas realidades” en id. *Afiliación sindical en Europa: modelos y estrategias*, II vols., Valencia, Germania, 2004, vol. I, pp. 21-65.

BENGOCHEA, Juan y ERRASTI, José M^a, “El futuro de las pensiones”, *Información Comercial Española*, nº 736, (1994), pp. 145-167.

BENITO del POZO, Carmen, “Cambio económico, acción sindical y conflicto: el sector naval en Asturias, 1982-1985” en TUSELL, Javier [et al.] (eds.), *Historia de la Transición y consolidación democrática en España (1975-1986) [Congreso Internacional. Historia de la Transición y Consolidación Democrática en España]*, II vols., Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia / Universidad Autónoma de Madrid, 1996, vol. II, pp. 397-410.

BENJAMIN, Walter, *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, México, Unidad Autónoma de la Ciudad de México / Itaca, 2008.

BENTOLILA, Samuel, SEGURA, Julio y TOHARIA, Luis, *La contratación temporal en España*, Madrid, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 1991.

- DOLADO, Juan J., *La contratación temporal en España y sus efectos sobre la competitividad*, Madrid, Banco de España, 1993.
- “Labour flexibility and wages: Lessons from Spain”, *Economy Policy*, nº 18, (1994), pp. 54-99.
- JIMENO, Juan F., “La reforma de la negociación colectiva en España”, *Documentos de Trabajo. FEDEA*, nº 2002-03, (2002).
- DOLADO, Juan J., “Spanish unemployment: The end of the wild ride?”, *Documentos FEDEA*, nº 2003-010, (2003).

BERAMENDI, Justo G., “La cultura política como objeto historiográfico. Algunas consideraciones de método” en ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso (presidente Comité Organizador) [et al.], *Cultura y civilizaciones: III Congreso de la Historia Contemporánea [3º, 1996, Valladolid]*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 74-94.

- BAZ, Manuel J. (eds.), *Identidades y memoria imaginada [7º, 2004, Santiago de Compostela y Orense]* Valencia, Publicacions Universitat de València, 2008.

BERGUERE DEZAPHI, Joelle, *Las actitudes ideológicas-políticas de los trabajadores en situación de desempleo. Un estudio de casos*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1989.

- ALVARO ESTRAMINA, José Luis y TORREGROSA PERÍS, José Ramón (coords.), *Juventud, trabajo y desempleo: Un análisis psicológico*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1989.

BERGUA AMORES, José Ángel, “De-finición y des-finitación de la juventud: una crítica de la teoría estándar”, *Política y Sociedad*, nº 32, (1999), pp. 231-242.

BERICAT ALASTUEY, Eduardo (ed.), *El conflicto cultural en España: acuerdos y desacuerdos entre los españoles*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2003.

- (coord.), *El cambio social en España*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2006.

BERLANSTEIN, Lenard R. (ed.), *Rethinking Labor History. Essays on discourse and class analysis*, Urbana, University of Illinois Press, 1993.

BERLINSKI, Claire, *There is no Alternative: Why Margaret Thatcher Matters*, New York, Basic Books, 2008.

BERMAN, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, Madrid, Siglo XXI, 1988.

BERMÚDEZ ODRIOZOLA, Luis, PÉREZ de AYALA BECERRIL, Luís y PÉREZ de AYALA BECERRIL, Miguel, *Comentarios al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*, Valladolid, Lex Nova, 2001.

BERNAD, Enrique y FORCADELL, Carlos (eds.), *Historia de la Unión General de Trabajadores de Aragón. Un siglo de cultura sindical y socialista*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2000.

BERNALES SASTRE, Josep G., “Políticas de juventud y nueva condición juvenil” en *Discursos y debates en políticas de juventud*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 59, (2002), pp. 50-57.

BERNARDI, Fabrizio, *Análisis de la historia de acontecimientos*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006

BERNECKER, Walter L., ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ, Diego y MAIHOLD, Günther (eds.), *¿Crisis? ¿Qué crisis? España en busca de su camino*, Madrid, Iberoamericana / Frankfurt am Main / Vervuert, 2009.

- “Historia del presente: ¿de la «primera modernidad» a la «reflexiva»?” en CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo, FANDIÑO, Roberto G. y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Historia social, movimientos sociales y ciudadanía [VII Simposio Internacional de Historia Actual organizado por el Instituto de Estudios Riojanos en 2008]*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, pp. 35-60.

BERINS COLLIER, Ruth, *Paths toward democracy. The working class and elites in Western Europe and South America*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

BERRUGUETE REVUELTA, Francisco Javier, “Un año de experiencia en la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido” *Papeles de Economía Española*, nº 30-31, (1987), pp. 272-278.

BERSTEIN, Serge (dir.), *Les cultures politiques en France*, Paris, Le Seuil, 1999.

- “Introduction. Nature et fonction des cultures politiques” en id. (dir.), *Les cultures politiques en France*, Paris, Du Seuil, 1999, pp. 7-31.

BERZAL de la ROSA, Enrique, “¿Un movimiento obrero controlado por el clero?” en NICOLÁS MARÍN, Encarna y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (eds.), *Ayer en discusión: temas claves de la historia contemporánea hoy [IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Murcia, 17, 18*

y 18 de septiembre de 2008], Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2008 [CD-ROM].

BERZOSA, Carlos, “La política económica del PSOE. Condicionantes y presupuestos” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista a debate*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1986, pp. 71-80.

- *Economía, crisis o recuperación*, Madrid, Eudema, 1988.
- *Los socialistas utópicos. Marx y sus discípulos*, Madrid, Síntesis, 2000.

BERZOZA MARTÍNEZ, Raúl, *Hacia el año 2000: ¿qué nos espera en el siglo XXI?* Bilbao, Desclee de Brouwer, 1998.

BEST, Joel, *Uso y abuso de las estadísticas. La distorsión en la percepción pública de los problemas sociales y políticos*, Santiago de Chile, Cuatro Vientos, 2010.

BETRÁN, Concha, CUBEL, Antonio, PONS, M^a Ángeles y SANCHÍS, M^a Teresa, *La España democrática (1975-2000). Economía*, Madrid, Síntesis, 2010.

BILBAO, Andrés, “El efecto de las políticas de empleo en España” en BAYLOS, Antonio [et al.], *Nuevas tecnologías y clase obrera*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1989, pp. 81-88.

- “La utilización ideológica de los jóvenes” en TORREGROSA, José Ramón, BERGERE, Joelle y ESTRAMIANA, José Luis A. (eds.), *Juventud, trabajo y desempleo: Un análisis psicológico*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1989, pp. 59-65.
- “De la clase obrera a la sociedad de ciudadanos” en LACALLE, Daniel [et al.], *Trabajo y clase obrera hoy*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1991.
- PRIETO, Carlos, *Políticas empresariales de mano de obra (Un estudio realizado en la cuenca industrializada del sur madrileño)*, Madrid, Comunidad de Madrid, 1991.
- “El contexto histórico de las ordenanzas laborales”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n^o 21-22, (1993), pp. 62-71.
- *Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera*, 2^a ed., Madrid, Trotta, 1995 [1993].
- *El accidente de trabajo, entre lo negativo y lo irreformable*, Madrid, Siglo XXI, 1997.
- “La posición del trabajo y la reforma del mercado de trabajo” en MIGUÉLEZ Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones de empleo en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 305-322.
- *El empleo precario. Seguridad de la economía e inseguridad del trabajo*, Madrid, CAES, 1999.

BILBAO ARRESE, Jesús Mario, “Ley Electoral y sistema de partidos en España”, *Revista de Estudios Políticos*, n^o 85, (1994), pp. 313-322.

BILL, James A. y HARDGRAVE, Robert L., *Comparative Politics. The Quest for Theory*, Boston, Merrill, 1981.

BIRCH SØRENSEN y JØRGEN WHITTA-JACOBSEN, Hans, *Introducción a la macroeconomía avanzada*, II vols. Madrid, McGraw-Hill, 2008.

BLACK, Cyril Edwin, “La dinámica de la modernización: un repaso general” en NISBET, Robert., KUHN, Thomas S. WHITE, Lynn [et al.], *Cambio social*, Madrid, Alianza, 1988, pp. 226-256.

BLANCH RIBAS, Josep, *Desempleo juvenil y salud psicosocial*, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1986.

- *Del viejo al nuevo paro: un análisis psicológico y social*, Barcelona, PPU, 1990.
- (coord.), *Teoría de las relaciones laborales. Fundamentos*, Barcelona, UOC, 2003.

BLANCHFLOWER, David G. y FREEMAN, Richard B. (eds.), *Youth Employment and Joblessness in Advanced Countries*, NBER, Chicago University Press, 2000.

BLANCO, Rosa y CALZADA TERRADOS, Blas, “La propiedad de las acciones en España (1992-1999), *Bolsa de Madrid*, n^o 93, (2000), pp. 25-27.

- BLANCO JIMÉNEZ, Carlos, *SINTEL, el callejero de la esperanza: la esperanza está en la calle*, Madrid, C. Blanco, 2002.
- BLARDONE, Gilbert, *Le Fond Monétaire International. L'ajustement et les coûts de l'homme*, Paris, Les Editions L'Epargne, 1990.
- BLASCO LAHOZ, José Francisco, *La reforma de la Seguridad Social: el Pacto de Toledo y su desarrollo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997.
- BLASCO PELLICER, ÁNGEL, *La individualización de las relaciones laborales*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1995.
- BLOCK, Fred L., *Los orígenes del desorden económico mundial: la política monetaria internacional de los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestro días*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1980.
- *Postindustrial possibilities: A critique of Economic Discourse*, Berkeley, University of California Press, 1990.
- BLYTH, Mark, *Great transformations: economic ideas and institutional change in the twentieth century*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- BODI ROMIRO, Julio, “¿Y ahora qué? Patrimonio, identidad y trabajo a 26 años de la reconversión industrial en el Puerto de Sagunto”, *Sociología del Trabajo*, nº 71, (2011), pp. 100-177.
- BOYD, Carolyn P. y BOYDEN, James M., “The Armed Forces and the Transition to Democracy in Spain” en LANCASTER, Thomas y PREVOST, Gary (eds.), *Politics and Change in Spain*, New York, Praeger, 1985.
- BOIX, Carles, “Building a socialdemocratic strategy in Southern Europe: Economic Policy under the González Government (1982-93)”, *Working Papers Instituto Juan March*, nº 69/1995, (1995).
- *Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial*, Madrid, Alianza, 1996.
 - “El gobierno de la economía: naturaleza y determinante de la política económica en España” en GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), *Políticas públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno*, Barcelona, Ariel, 1998, pp. 39-54.
 - RIBA, Clara, “Las bases sociales y políticas en las elecciones generales españolas: recursos individuales, movilización estratégica e instituciones electorales”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 90, (2000), pp. 95-128.
- BOIXAREU, Ramón, “El tratado de Maastricht: Génesis, estado actual y perspectivas”, *Papeles de Economía Española*, nº 52-53, (1992), pp. 2-17.
- BOLLÉ, Patrick, “Perspectivas. Novedades en las estadísticas del trabajo”, *Revista Internacional del trabajo*, vol. CXVIII, nº 1, (1999), pp. 75-92.
- BOLOGNA, Sergio, *Crisis de la clase media y posfordismo*, Madrid, Akal, 2006.
- BOLTANSKI, Luc y CHIAPELLO, Ève, *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris, Gallimard, 1999.
- *El nuevo espíritu del capitalismo*, Madrid, Akal, 2002.
- BONACHELA MESAS, Manuel [et al.], *El comportament electoral a l'Estat Espanyol (1977-1982)*, Barcelona, Fundación Jaume Bofill / La Magrana, 1984.
- BONAMUSA, Francesc y SERRALLONGA, Joan (eds.), *La sociedad urbana en la España Contemporánea [II Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, 1994]*, Barcelona, Asociación de Historia Contemporánea, 1994.
- (ed.), *La Huelga General*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 4, (1991).
- BONAMY, Joël y BARCET, Andrés, “Servicios a empresas y eficacia del sistema productivo: de la transacción a la valoración en *Economía Industrial*, nº 313, (1997), pp. 59-66.
- BONELL, Victoria E. y HUNT, Lynn, *Beyond the cultural turn: new directions in the study of society and culture*, Berkeley / Los Ángeles, University of California Press, 1999.
- BONILLA, Manuel, *Los amos del PSOE*, Madrid, Arco de la Alianza Cultural, 1986.

BONILLA HERRERA, José M^a, “El déficit permanente de la balanza comercial española”, *Papeles de Economía Española*, nº 11, (1982), pp. 46-68.

- BUISÁN, Ana, “El entorno exterior y la demanda externa” en SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA (ed.), *El análisis de la economía española*, Madrid, Alianza, 2005, pp. 271-308.

BONO, José, *A vueltas con el futuro: reflexiones para la renovación del socialismo*, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

BORDERÍAS, Cristina, *Entre líneas: trabajo e identidad femenina en la España contemporánea. La compañía Telefónica, 1924-1980*, Barcelona, Icaria, 1993.

- CARRASCO, Cristina y ALEMANY, Carme (comps.), *Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales*, Barcelona, Icaria, 1994.
- HURTADO, Javier (coords.), *Dones, treball i sindicalisme a Catalunya, 1939-1978*, III vols., Barcelona, Arxiu Històric de la CONC, 1999.
- BORREL, Mónica, IBARZ, Jordi y VILLAR, Conchi, “Los eslabones perdidos del sindicalismo democrático” en PÉREZ PÉREZ, José Antonio (coord.), *Desarrollismo, dictadura y cambios sociales*. Dossier monográfico *Historia Contemporánea*, nº 26, (2003), pp. 161-206.
- (coord.), *Joan Scott y las políticas de la historia*, Barcelona, Icaria, 2006.

BORDOGNA, Lorenzo, “Strikes in Europe: still a decade of decline or the eve of a new upsurge?”, *Indian Journal of Industrial Relations*, vol. XLV, (2010), pp. 646-657.

BORON, Atilio A., GABINA, Julio C. y MINSBURG, Naúm (comp.), *Tiempos violentos: neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, 2004.

BORRELL, José, “La política presupuestaria para 1983”, *Hacienda Pública Española*, nº 82, (1983), pp. 51-54.

- “Los presupuestos del Estado para 1984: Objetivos y estructura”, *Hacienda Pública Española*, nº 85, (1984), pp. 51-59.
- “Aspectos estructurales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985”, *Hacienda Pública Española*, nº 90, (1984), pp. 57-70.
- “Balance del sistema tributario”, *Papeles de Economía Española*, nº 30-31, (1987), pp. 56-63.
- “Balance de la política presupuestaria durante el período de 1982-1988”, *Hacienda Pública Española*, nº 110-111, (1988), pp. 19-35.
- “Evolución y tendencias del gasto público”, *Papeles de Economía Española*, nº 37, (1988), pp. 174-183.
- “Economía y fiscalidad en Europa”, *Papeles de Economía Española*, nº 41, (1989), pp. 91-101.
- “De la Constitución a Europa: una década de política fiscal”, *Información Comercial Española*, nº 680, (1990), pp. 9-37.
- “El papel del Estado en la economía y en la salida de la crisis”, *Sistema*, nº 117, (1993), pp. 5-18.
- “Sector público y procesos de privatización”, *Leviatán*, nº 66, (1996), pp. 39-58.
- *Al filo de los días*, Madrid, Cauce, 1998.

BOSANQUET, Nicholas, *After the New Right*, Hamshire, Dartmouth, 1983.

BOSCÁ, José Emilio, FERNÁNDEZ, M^a y TAGUAS, David, “El gasto en Protección Social en España: un análisis comparado con la Unión Europea”, *Documentos de Trabajo de la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda*, nº D-97003, (1997).

BOSE, Mihir, *The Crash: the fundamental flaws which caused the 1987-8 world stock market slump and what they mean for future financial stability*, London, Bloomsbury, 1988.

BOTE GÓMEZ, Venancio, “El desarrollo del turismo en España: cambio de rumbo y oportunidades científicas”, *Revista valenciana d'estudis autòmics*, n° 25, (1998), pp. 29-44.

BOTELLA, Joan, “En torno al concepto de cultura política: dificultades y recursos” en CASTILLO, Pilar del y CRESPO, Ismael (eds.), *Cultura Política. Enfoques teóricos y análisis empíricos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1997, pp. 17-37.

BOTWINICK, Howard, *Persistent Inequalities. Wage disparities under Capitalism Competition*, Princeton, Princeton University Press, 1993.

BOUFFARTIGUE, Paul, “¿Fin del trabajo o crisis del trabajo asalariado?” en *Trabajo y proceso del trabajo*. Dossier monográfico, *Sociología del Trabajo*, n° 29, (1996-1997), pp. 91-110.

BOURDIEU, Pierre y BOLTANSKI, Luc, “La production de l'idéologie dominante”, *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. II, n° 2-3, (1976), pp. 4-73.

- *La Distinction: Critique sociale du jugement*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.
- *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus, 1988.
- *Las estrategias de la reproducción social*, Madrid, Siglo XXI, 2011 [“Stratégies de reproduction et modes de domination”, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, vol. CV, (1994), pp. 3-12].

BOUDON, Raymond, *Theories of Social Change*, Cambridge, Polity Press, 1991.

BOVER, Olympia, ARELLANO, Manuel, “Female labour force participation in the 1980s: the case of Spain”, *Documento de Trabajo del Banco de España*, n° 9427, (1994).

- y id. y BENTOLILA, Samuel, “Duración del desempleo, duración de las prestaciones y ciclo económico”, *Estudios Económicos. Servicio de Estudios del Banco de España*, n° 57, (1996).

BOYER, Miguel, “Entrevista” en PSOE, *Hacia el cambio...100 días en el Gobierno*, Madrid, PSOE, 1983, pp. 119-126.

- “Por la solidaridad hacia la salida de la crisis” en PSOE-EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *Un año para la esperanza: 365 días de gobierno socialista*, Madrid, PSOE, 1983.
- “Presentación en el pleo del Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983”, *Hacienda Pública Española*, n° 82, (1983), pp. 19-50.
- “Opiniones”, *Papeles de Economía Española*, n° 16, (1983), pp. 366-368.
- “Presentación ante el pleno del Congreso de Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984”, *Hacienda Pública Española*, n° 85, (1984).
- “Características de los presupuestos generales del Estado para 1984”, *Hacienda Pública Española*, n° 83, (1984), pp. 129-144.
- “Presentación ante el pleno del Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 1985”, *Hacienda Pública Española*, n° 90, (1984), pp. 21-56.
- “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas. 25 años de economía y sociedad españolas*, Madrid / Barcelona, Marcial Pons, 2005, pp. 81-130.
- “El segundo ajuste económico de la democracia española (diciembre de 1982-julio de 1985)” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas españoles*, IX vol., Barcelona, Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 1999, vol. VIII, pp. 293-304.

BOYER, Robert, (dir.), *La flexibilité du travail en Europe, Une étude comparative des transformations du rapport salarial dans sept pays de 1975 à 1985*, II vols., Paris, Le Découverte, 1986, vol. I.

- “Relación salarial, acumulación y crisis: 1968-1982” en JÓDAR, Pere y MARTÍN ARTELES, Antonio (coords.), *Crisis económica y relaciones industriales. Ensayos sobre el conflicto capital/trabajo. Estrategias alternativas*, Madrid, Grupo Cultural Zero, 1984, pp. 207-232.

- (dir.) *La flexibilidad del trabajo en Europa: un estudio comparativo de las transformaciones del trabajo asalariado en siete países, entre 1973 y 1985*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.
 - “¿Flexibilidades defensivas... u ofensivas?” en id. (dir.), *La flexibilidad del trabajo en Europa: un estudio comparativo de las transformaciones del trabajo asalariado en siete países, entre 1973 y 1985*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986, pp. 277-311.
 - *Regulation School: A Critical Introduction*, New York, Columbia University Press, 1990.
 - *Teoría de la regulación. Un análisis crítico*, Valencia, Alfons el Magnàmin, 1992.
 - FREYSSINET, Michael, “Emergencia de nuevos modelos industriales: Problemática del programa internacional del GERPRISA”, *Sociología del Trabajo*, nº 27, (1996), pp. 23-54.
 - *Crisis y regímenes de crecimiento. Una introducción a la teoría de la regulación*, Buenos Aires, Niño Dávila / Ceil Piette, 2007.
- BRÄNDLE, Gaspar, “Consumo y cambio social en España: evolución del equipamiento doméstico (1983-2005)”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 120, (2007), pp. 75-114.
- BRAÑA PINO, Francisco Javier, “El sistema tributario español de la democracia. Principales características, evolución y algunas propuestas de reforma” [trabajo elaborado para la Fundación 1º de Mayo], enero 2010.
- BUESA, Mikel y MOLERO, José, *El Estado y el cambio tecnológico en la industrialización tardía. Un análisis del caso español*, Madrid / México, Fondo de Cultura Economía, 1984.
- BRAVERMAN, Harry, *Labor and monopoly capital: the degradation of work in the twentieth century*, New York, Monthly Review Press, 1974.
- *Trabajo y capital monopolista: La degradación del trabajo en el siglo XX*, México, Nuestro Tiempo, 1987.
- BRAVO PAIVA, Manuel, “Informe de la Unidad Especial para el estudio del fraude: síntesis de su contenido”, *Cuadernos de Actualidad*, vol. V, nº 6, (1994), pp. 217-227.
- BRENNERS, Robert, *La economía de la turbulencia global. Las economías capitalistas avanzadas de la larga expansión al largo declive, 1945-2005*, Madrid, Akal, 2009.
- BRENDEL, Cajo y SIMON, Henri, *Ilusiones políticas y lucha de clases: del antifranquismo al posfranquismo*, Bilbao, Virus, 2004.
- BROWN, E. Cary y SOLOW, Robert, M. (eds.), *Paul Samuelson and modern economic theory*, New York, McGraw Hill, 1983.
- BROWN, Richard K., “¿Sucesión o acumulación? Sobre los cambios en los enfoques teóricos y en las preocupaciones sustantivas de la sociología del trabajo y del empleo”, *Sociología del Trabajo*, nº 69, (2010), pp. 5-19.
- BUCCI-GLUCKSMANN, Christinne, *Gramsci y el estado: hacia una teoría materialista de la filosofía*, Madrid, Siglo XXI, 1978.
- BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coords.), *Estrategias de alianza y políticas unitarias en la historia del PCE. Dossier monográfico Papeles de la FIM*, nº 24, (2006), pp. 129-150.
- HINOJOSA, José y GARCÍA GARCÍA, Carmen (eds.), *Historia del PCE: I Congreso, 1920-1977*, II vols., Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007, vol. II, pp. 45-58.
 - GÁLVEZ BIESCA, Sergio (eds.), «*Nosotros los comunistas*». *Memoria, identidad e historia social*, Sevilla, Fundación de Investigaciones Marxistas / Atrapasueños, 2009.
 - y id., “Por una historia social del comunismo. Notas de aproximación” en id. y id. (eds.), «*Nosotros los comunistas*». *Memoria, identidad e historia social*, Sevilla, Fundación de Investigaciones Marxistas / Atrapasueños, 2009, pp. 7-37.
- BUESA, Mikel y MOLERO, José, *Estructura Industrial de España*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1988.
- “Política tecnológica: una visión global”, *Economistas*, vol. X, nº 52, (1992), pp. 296-305.

- y id. "La industria: reorganización y competitividad" en GARCÍA GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 159-160.
- BUIGES, Pierre, "Los mercados de los servicios en la economía de la Unión Europea" en *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, nº 3, (1994), pp. 253-291.
- BUISÁN, Ana, "Principales determinantes de los ingresos por turismo", *Documento de Trabajo. Banco de España*, nº 9502, (1992).
- "Exportaciones de turismo y competitividad", *Revista de Economía Aplicada*, vol. V, nº 13, (1997), pp. 65-91.
- BURAWOY, Michael, *Manufacturing consent. Changes in the labor process under monopoly capitalism*, Chicago, The University of Chicago Press, 1979.
- *El consentimiento en la producción: los cambios del proceso productivo en el capitalismo monopolista*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.
- BURDIEL, Isabel y ROMERO, M^a Cruz, "Historia y Lenguaje: la vuelta al relato dos décadas después", *Hispania*, vol. LVI, nº 192, (1996), pp. 333-346.
- BURGANN, Verity, "The strange death of labour history" en CARR, B. [et al.], *Bede Fair and Labour history*, Sidney, Pluto Press, 1991, pp. 69-81.
- "The revival of labour history" en SHANAHAN, R. y SHANAHAN, M. (eds.), *Australian labour history reconsidered*, Adelaida, Austrial Humanities, 1999, pp. 240-244.
- BURGOS GINER, M^a Ángeles, "Prestación por desempleo: el subsidio asistencial cuasi-contributivo", *Revista de Treball, Economia y Societat*, nº 28, (2003), pp. 27-36.
- BURGUERA, Mónica, "La influencia de Joan Scott en la historia contemporánea de España: historia social, género y «giro lingüístico»" en BORDERÍAS, Cristina (coord.), *Joan Scott y las políticas de la historia*, Barcelona, Icaria, 2006, pp. 179-211.
- BURNS, Tom, *Conversaciones sobre socialismo*, Barcelona, Plaza & Janés, 1996.
- BUSE, Michael, *La nueva democracia española: sistema de partidos y orientación del voto (1976-1984)*, Madrid, Unión Editorial, 1984.
- BUSQUETS, Julio (ed.), *El papel de las Fuerzas Armadas en la transición española*. Dossier monográfico *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 36, (1986).
- BUSTAMANTE RAMÍREZ, Enrique, *Los amos de la información en España*, Madrid, Akal, 1982.
- BUSTELO, Francisco, *El Partido Socialista Obrero Español*, Barcelona, Avance, 1976.
- PECES BARBA, Gregorio, VICENTE, Carlos de y ZAPATERO, Virgilio, *El PSOE*, Madrid, Avance, 1977.
- *Introducción al socialismo marxista*, Madrid, Dédalo, 1979.
- *La izquierda imperfecta. Memorias de un político frustrado*, Barcelona, Planeta, 1996.
- *La historia de España y el franquismo: un análisis histórico y económico y un testimonio personal*, Madrid, Síntesis, 2006.
- BRU PARRA, Segundo y PASTOR, Vicente J., "Consideraciones en torno al concepto de Política Industrial y su dimensión espacial: el caso español", *Estudios Territoriales*, nº 22, (1986), pp. 55-68.
- CABALLERO, Juan Carlos, "La información estadística sobre el mercado de trabajo", *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 71, (2008), pp. 67-98.
- CABANA, Francesc, *Banca Catalana, diari personal*, Barcelona, Tibidabo, 1989.
- CABANA IGLESIA, Ana, LANERO TÁBOAS Daniel y SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor Manuel (eds.), *VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo [7º. 2009, Santiago de Compostela]*, Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo, 2010 [CD-ROM].
- CABEZA PEREIRO, Jaume y LOUSA AROCHENA, José Fernando, *Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Granada, Comares, 1998.

CABO, José M^a, *La economía como ideología: mitos, fantasías y creencias de la 'ciencia' económica*, Hondarribia, Hiru, 2004.

CABRERA, Miguel Ángel, “Historia y teoría de la sociedad: del giro culturalista al giro lingüístico” en FORCADELL, Carlos y PEIRÓ, Ignacio (coords.), *Lecturas de la Historia. Nueve reflexiones sobre Historia de la Historiografía*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2001, pp. 255-272.

- *Historia, lenguaje y teoría de la sociedad*, Madrid, Cátedra, 2001.
- “La crisis de la historia social y el surgimiento de una historia postsocial”, *Historia Social*, n° 51, (2003), pp. 201-224
- *Postsocial History. An Introduction*, Oxford, Lexington Books, 2004.
- “El debate postmoderno sobre el conocimiento histórico y su repercusión en España”, *Historia Social*, n° 50, (2004), pp. 141-164.
- “Developments in Contemporary Spanish Historiography: From Social History to the New Cultural History”, *The Journal of Modern History*, vol. LXXVII, n° 4, (2005), pp. 988-1023.
- SANTANA ACUÑA, Álvaro, “De la historia social a la historia de lo social” en id. (ed.), *Más allá de la historia social*. Dossier monográfico *Ayer*, n° 62, (2006), pp. 165-192.
- DIVASSÓN, Blanca y FELIPE, Jesús de, “Historia del movimiento obrero. ¿Una nueva ruptura?” en BURGUERA, Mónica y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), *Historias de España contemporánea. Cambio social y giro cultural*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008, pp. 45-80.
- “La historia y los historiadores tras la crisis de la modernidad” en SÁNCHEZ LEÓN, Pablo y IZQUIERDO MARTÍN, Jesús (coords.), *El fin de los historiadores: pensar históricamente en el siglo XXI*, Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 41-60.
- “Presente histórico y cambio historiográfico. El presente como laboratorio de la investigación histórica” en CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo, FANDIÑO PÉREZ, Roberto y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Historia social, movimientos sociales y ciudadanía*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, pp. 23-34.

CABRERA, Mercedes y REY REGUILLO, Fernando del, “Rafael del Pino Moreno (1920)” en TORRES VILLANUEVA, Eugenio (dir.), *Los 100 empresarios españoles del siglo XX*, Madrid, LID, 2000, pp. 482-487.

- *El poder de los empresarios. Política e intereses económicos en la España contemporánea (1875-2000)*, Madrid, Taurus, 2002.
- *Juan March (1880-1962)*, Madrid, Marcial Pons, 2011.

CABRERA CABRERA, Pedro José, “El difícil acceso a la vivienda en España. Informe Nacional 2001”, octubre 2001 [original en poder del autor].

CABRERO, Claudia, DÍAZ, Irene y GORDON, Carlos, “Fuentes para el estudio de la abogacía antifranquista” en GÓMEZ ALÉN, José y VEGA, Rubén (coords.), *Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista (Vol. 1)*, Madrid, Fundación de Abogados de Atocha de CCOO de Madrid / Ediciones GPS, 2010, pp. 332-356.

CACHO, Jesús y GARCÍA-ABADILLO, Casimiro, *La estafa: Ibercorp y el fin de una era*, 2ª ed., Madrid, Temas de Hoy, 1992.

CACHÓN, Lorenzo, “La contratación temporal en España: mercado de trabajo y prácticas empresariales” en *El reto del empleo*. Dossier monográfico, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, n° 31-32, (1995), pp. 208-235.

- *Políticas de inserción de los jóvenes en los mercados de trabajo en la Unión Europea*, Montevideo, Cinterfor, 1997.
- (dir.), *Juventudes, mercados de trabajo y políticas de empleo*, Valencia, 7 i Mig, 1999.
- *Juventud y empleos: perspectivas comparadas*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2000.
- “Los jóvenes en el mercado de trabajo en España” en id. (dir.), *Juventud y empleos: perspectivas comparadas*. Madrid, Instituto de la Juventud, 2000, pp. 133-175.

- (dir.), *Colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo y políticas activas de empleo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004.
- CACIAGLI, Mario, "España 1982: las elecciones del cambio". Dossier monográfico, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 28, (1984), pp. 85-118.
- *Elecciones y partidos en la transición española*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1986.
- CADARSO, M^a Ángeles y FEBRERO, Eladio, "Sistemas de reparto *versus* sistema de capitalización. Algunas reflexiones críticas", *IX Jornadas de Economía Crítica*, Madrid, marzo de 2003 [ponencia] [www.ucm.es/info/ec/jec9/areas.htm].
- CAFAGNA, Luciano, "Modernización activa y modernización pasiva" en CARNERO, Teresa (ed.), *Modernización, desarrollo político y cambio social*, Madrid, Alianza, 1992, pp. 221-234.
- CAÍNZOS, Miguel Ángel, "Clase, acción y estructura: de E. P. Thompson al posmarxismo", *Zona Abierta*, nº 50, (1989), pp. 1-69.
- CALDERÓN, José Ángel: "Repensar la cuestión de la resistencia en el trabajo, o buscando al trabajador perdido: un estudio de caso en el sector del telemarketing", *Sociología del Trabajo*, 56 (2006), pp. 33-73.
- LÓPEZ CALLE, Pablo, "Transformaciones del trabajo e individualización de las relaciones laborales", *Sociología del Trabajo*, nº 68, (2010), pp. 3-26.
- CALERA, Alfonso A (dir. y coord.), *Diagnóstico de la utilización de sustancias químicas en la industria española*, Madrid, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2005.
- CALERO, Juan R., *La construcción de la derecha española*, Murcia, Prócer, 1985.
- CALLE ROBLES, Luis de la, "Carretas y votos: el PSOE y las políticas territoriales de construcción de coaliciones de apoyo (1982-1996)", *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, vol. IV, nº 1, (2005), pp. 65-96.
- CALLE VELASCO, M^a Dolores y REDERO SAN ROMÁN, Manuel (eds.), *Movimientos sociales en la España del siglo XX*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2008.
- CALLEJO GALLEGO, Manuel Javier, "Las transformaciones del sentido del trabajo: un análisis comparativo entre generaciones" en CRESPO, Eduardo, PRIETO, Carlos y SERRANO, Amparo (coords.), *Trabajo, subjetividad y ciudadanía: paradojas del empleo en una sociedad en transformación*, Madrid, Editorial Complutense / Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009, pp. 175-206.
- CALVO, Enrique, *Crisis crónica: la construcción social de la gran recesión*, Madrid, Alianza, 2009.
- CALVO HERNANDO, Pedro, *Todos me dicen Felipe*, Barcelona, Plaza & Janés, 1987.
- CALVO ORTEGA, Francisco, "El postfordismo en la organización del territorio", *Sistema*, nº 187, (2005), pp. 35-52.
- CALVO-ORTEGA, Rafael, "Una tarea difícil: el Estatuto de los Trabajadores" RUESGA, Santos M., VALDÉS DAL-RÉ, Fernando y ZUFIAUR, José M^a (coords.), *Transformaciones laborales en España: a XXV años de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, pp. 203-218.
- CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas. 25 años de economía y sociedad españolas*, Madrid / Barcelona, Marcial Pons, 2005.
- "Las transiciones" en id. [et al.], *Cinco lustros apenas. 25 años de economía y sociedad españolas*, Madrid / Barcelona, Marcial Pons, 2005, pp. 11-22.
- CALZADA GUTIÉRREZ, Inés, *La tela que nos teje: un estudio comparado de las bases que sustentan la legitimidad de las políticas de bienestar*, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 2008.
- *La tela que nos teje: un estudio comparado de las bases que sustentan la legitimidad de las políticas sociales*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010.
- CAMACHO, Marcelino, *Memorias: confieso que he luchado*, Madrid, Temas de Hoy, 1990.
- CÁMARA IZQUIERDO, Sergio, *Tendencias de acumulación y de la rentabilidad del capital en España (1954-2001)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2003.

- “La rentabilidad del capital en España”, *Revista de Economía Crítica*, nº 1, (2003), pp. 201-228.
- CAMBIO 16, *Un hombre, un voto guía electoral de 1977*, Madrid, Cambio 16, 1977.
- CAMBRA, Pilar, *Socialismo no es libertad. El verdadero programa del PSOE*, Madrid, Dossant, 1979.
- CAMPO, Julián, RUIZ LIGERO, Apolonio, ZABALZA, Antoni y ESCUDERO, Manuel, “El mercado: su papel en la crisis” en GUERRA, Alfonso CABALLERO, Abel y TEZANOS, José Félix (eds.), *La socialdemocracia ante la economía de los años noventa*, Madrid, Sistema, 1994, pp. 69-114.
- CAMPO, Salustiano del (dir.), *Tendencias sociales en España (1960-1990)*, III vols., Bilbao, Fundación BBV, 1993.
- CAMPO VIDAL, M., *La España que hereda Felipe González*, Barcelona, Argos Vergara, 1982.
- CANALS MARGALEF, Jordi, “Deuda pública, déficit público y tipos reales de interés”, *Información Comercial Española*, nº 665, (1988), pp. 11-136.
- CANCHO, Nuria E., “La Encuesta de Población Activa adapta su metodología a la UE”, *Fuentes Estadísticas*, nº 62, (2002).
- CÁNDIDO [ÁLVAREZ, Carlos Luis], *La sangre de la rosa. El poder y la época (1982-1996)*, 2ª ed., Barcelona, Planeta, 1996.
- CANESSA MONTEJO, Miguel F., “Los derechos humanos laborales: el núcleo duro de derechos (*core rights*) y el «ius cogens» laboral”, *Revista del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 72, (2008), pp. 111-151.
- CANNADINE, David (ed.), *¿Qué es la historia ahora?* Granada, Universidad de Granada / Almed, 2005.
- CANO, Ernest, BILBAO, Andrés y STANDIGN, Guy, *Precariedad laboral, flexibilidad y desregulación*, Valencia, Germania, 2000.
- “Formas, percepciones y consecuencias de la precariedad”, *Mientras Tanto*, nº 93, (2004), pp. 67-81.
- CANO SOLER, Diego, *Políticas de privatización: aproximación teórica. Experiencias prácticas y propuesta para España*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.
- CANSECO CANSECO, José Emilio, *Política fiscal de España: estudio de la política económica pública española desde el Plan de Estabilización*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1978.
- CANTERAS MURILLO, Andrés, *Sentidos, valores y creencias de los jóvenes*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2002.
- CAPARRÓS, Rafael (ed.), *La Europa de Maastricht*, Málaga, Universidad de Málaga, 1994.
- CAPELLÀ, Margalida y GINARD, David (coords.), *Represión política, justicia y reparación: la memoria histórica en perspectiva jurídica*, Palma (de Mallorca), Documenta Balear, 2009.
- CAPELLA, Juan Ramón (ed.), *Las sombras del sistema constitucional español*, Madrid, Trotta, 2003.
- CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo, FANDIÑO, Roberto G. y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Historia social, movimientos sociales y ciudadanía [VII Simposio Internacional de Historia Actual organizado por el Instituto de Estudios Riojanos en 2008]*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011.
- y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Sociedad de masas, medios de comunicación y opinión pública*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2008.
- CAPILLA, Luis, *La Comisión Trilateral: el gobierno del mundo en la sombra*, Madrid, Acción Cultural Cristiana, 1993.
- CAPRARELLA, Marcello, *Madrid durante el franquismo: crecimiento económico, política de imagen y cambio social*, Madrid, Consejo Económico y Social. Comunidad de Madrid, 2001.
- CARABANTES, Antonio, *Balance y futuro del socialismo*, Barcelona, Planeta, 1984.
- CARABAÑA MORALES, Julio (coord.) y GARRIDO, Luis (ed.), *Reparto de trabajo y crisis social*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986.

- CARASA, Pedro (ed.), *Elites. Prosopografía Contemporánea*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994.
- CARAVALE, Mario, *Storia del Diritto nell'Europa Moderna e Contemporanea*, Roma, Laterza, 2012.
- CARBALLO, Roberto, TEMPRANO, Antonio G. y MORAN SANTÍN, José Antonio (eds.), *Crecimiento económico y crisis estructural en España (1959-1980)*, Madrid, Akal, 1981.
- CÁRBOBA, Ángel, *Caracterización de la salud de los trabajadores en España*, Madrid, Confederación Sindical de CCOO / Departamento de Salud Laboral, 1997.
- CÁRCEL, Vicente, *La Iglesia y la transición española*, Valencia, EDICEP, 2003.
- CÁRCELES BREIS, Gabriel, "La polémica sobre las prestaciones sociales de la vejez: demografía y economía política versus sociología de la ancianidad", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 73, (1996), pp. 191-207.
- CARD, David y KRUEGER, Alan B., *Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wages*, Princeton NJ, Princeton University Press, 1994.
- CARDENAL CARRO, Miguel, "La «racionalización» y aumento de cuantía del salario mínimo interprofesional", *Aranzadi Social*, nº 5, (2004), pp. 109-122.
- CARDENAL DE LA NUEZ, Mª Eugenia, *El paso a la vida adulta: dilemas y estrategias ante el empleo flexible*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006.
- CARDONA LLORENS, Jorge, "El Tratado de Maastricht: un hito en la historia de la construcción europea" en FORNER MUÑOZ, Salvador (ed.), *La Construcción de Europa: de las "guerras civiles" a la "unificación"*, Madrid / Alicante, Biblioteca Nueva / Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2007, pp. 115-128.
- CARGÍA SERRANO, Carlos García y JIMENO SERRANO, Juan Francisco, "La participación de las rentas del trabajo y de los beneficios en la renta nacional" en *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25-26, (1994), pp. 73-84.
- CARIDAD y OCERÍN, José Mª, *Estadística aplicada en ciencias sociales*, [Córdoba], Universidad de Córdoba. Departamento de Estadística, 2010.
- CARLI, Romina de, "La jerarquía episcopal y el proyecto democratizador de Adolfo Suárez (julio 1976-junio 1977)", *Historia Actual Online*, nº 14, (2007), pp. 69-79.
- CARNERO ARBAT, Teresa (ed.), *Modernización, desarrollo político y cambio social*, Madrid, Alianza, 1992.
- "Introducción" en (ed.), *Modernización, desarrollo político y cambio social*, Madrid, Alianza, 1992, pp. 9-34.
 - "La renovación de la Historia Política" en MORALES MOYA, Antonio y ESTEBAN, Mariano, (eds.), *La historia contemporánea de España. Primer Congreso de Historia Contemporánea de España [1º, 1992, Salamanca]*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 173-183.
- CARNICERO, Carlos, "De la calma a la revolución: aproximación a la conflictividad laboral en Álava en los últimos años del Franquismo (1970-1976)" en NICOLÁS MARÍN, Encarna y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (eds.), *Ayer en discusión: temas claves de la historia contemporánea hoy [IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Murcia, 17, 18 y 18 de septiembre de 2008]*, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2008 [CD-ROM].
- *La ciudad donde nunca pasa nada: Vitoria, 3 de marzo de 1976*, 2ª ed., Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2009.
- CARO FIGUEROA, Armando, *La flexibilidad laboral: fundamentos comparados para la reforma del mercado del trabajo argentino*, Buenos Aires, Biblos, 1993.
- *Modernización laboral. Cuadernos de un reformador empecinado*, Buenos Aires, Fundación de Trabajo, 1997.
- CARR, Edward H., *What is history?* London, University of Cambridge / Penguin, 1961.
- *¿Qué es la historia?* Barcelona, Ariel, 2001.

CARR, Raymond y FUSI, Juan Pablo, *España: De la dictadura a la democracia*, Barcelona, Planeta, 1979

CARRASCAL, José M^a, *La agonía del felipismo*, Madrid, Espasa-Calpe, 1996.

CARRASCO, Cristina, *El trabajo doméstico y la reproducción social*, Madrid, Instituto de la Mujer, 1991.

CARRASCO, Inmaculada, CASTAÑO, M^a Soledad y PARDO, Isabel, “Diferentes desarrollos del mercado de trabajo” en GALINDO MARTÍN, Miguel Ángel y RIBEIRO SORIANO, Domingo (eds.), *Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica*. Dossier monográfico, *Información Comercial Española*, n^o 858, (2011), pp. 89-102.

CARRASCO MORALES, Eva, *La cohesión económica social en la Unión Europea: consideración del caso español*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2000.

CARRERAS, Albert, *Industrialización española: estudios de historia cuantitativa*, Madrid, Espasa-Calpe, 1990.

- y id., “La gran empresa en la España contemporánea: entre el mercado y el Estado” en COMÍN, Francisco y MARTÍN ACEÑA, Pablo (eds.), *La empresa en la historia de España*, Madrid, Civitas, 1996, pp. 73-90.
- TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2^a ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989].
- “Industria” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2^a ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 357-453.
- PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2^a ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 1296-1376.

CARRERAS, Juan José, *Razón de historia: estudios de historiografía*, Marcial Pons, 2000.

- *Seis lecciones sobre la historia*, Zaragoza, Instituto «Fernando el Católico», 2003.
- FORCADELL, Carlos, “Introducción. Historia y política: usos” en id. y id. (eds.), *Usos públicos de la historia: ponencias del VI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea [6^o, 2002, Zaragoza]*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza / Marcial Pons, 2003, pp. 40-41.
- y id. (eds.), *Usos públicos de la historia: ponencias de VI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea [6^o, 2002, Zaragoza]*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza / Marcial Pons, 2003.
- “Introducción. Historia y política: usos” en id. y id. *Usos públicos de la historia: ponencias del VI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea [6^o, 2002, Zaragoza]*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza / Marcial Pons, 2003, pp. 11-45.
- [Comité Organizador] [et al.], *VI Encuentro de Investigadores del Franquismo: Zaragoza 15, 16 y 17 de noviembre de 2006 [6^o, 2009, Zaragoza]*, Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura, 2009.

CARRERAS Y ÁÑEZ, José Luis, “Perspectivas de la construcción en la década de los noventa”, *Papeles de Economía Española*, n^o 50, pp. 210-237.

CARRETERO MIRAMAR, José Luis, *Contratos temporales y precariedad*, Madrid, Confederación Sindical Solidaridad Obrera, 2007.

- “La imparable crisis del derecho del trabajo”, *Nómadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, n^o 19, (2008), pp. 415-420.

CARRILLO, Santiago, *Nuevos enfoques a problemas de hoy*, Paris, Editions Sociales, 1967.

- “Eurocomunismo” y estado, Barcelona, Crítica, 1977.
- *Mañana, España: Conversaciones con Régis Debray y Max Gallo*, Madrid, Akal, 1976.

- *Memorias*, Barcelona, Planeta, 2008 [1993].
- CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, “Crónica de jurisprudencia sobre la valoración expropiatoria de acciones y participaciones representativas del capital de empresas del grupo Rumasa”, *Revista General de Derecho Administrativo*, nº 1, (2002).
- CARRY, Alain, “Cuentas flexibles e historia económica cuantitativa” en ARANDA PÉREZ, Francisco José, SANZ CAMAÑES, Porfirio y FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco (coords.), *La historia en una nueva frontera = History in a new frontier*, Cuenca, Servicio de Publicaciones de Castilla-La Mancha, 2000.
- CARVAJAL, Pedro y MARTÍN, Julio, *Memoria Socialista: 125 años*, Madrid, Temas de Hoy, 2005.
- CASADO, Demetrio, *Sobre la pobreza en España, 1965-1990*, Barcelona, Hacer, 1990.
- CASADO, Fernando, “La empresa familiar en España”, *Economistas*, vol. XV, nº 73, (1997), pp. 82-85.
- CASAL BATALLER, Joaquim, “Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo XX”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 75, (1996), pp. 295-318.
- “Modalidades de transición profesional y precarización del empleo” en CACHÓN, Lorenzo (dir.), *Juventudes, mercados de trabajo y políticas de empleo*, Valencia, 7 i Mig, 1999, pp. 171-179.
- CASANELLAS, Pau, “Los últimos zarpazos del franquismo: el Decreto-Ley sobre prevención del terrorismo de agosto de 1975”, *Historia del Presente*, nº 12, (2008), pp. 155-172.
- CASANOVA, José, “Modernización y democratización: Reflexiones sobre la Transición española a la democracia” en CARNERO ABAT, Teresa (ed.), *Modernización, desarrollo político y cambio social*, Madrid, Alianza, 1992, pp. 235-276.
- CASANOVA, Julián, “Las caras cambiantes del sujeto histórico: en busca de la igualdad” en ROMERO, Mª Cruz y SAZ, Ismael (eds.), *El siglo XX. Historiografía e historia [5º, Valencia, 2000]*, Valencia, Universitat de València, 2002, pp. 111-115.
- “Introducción”, *Historia Social*, nº 50, (2004), pp. 3-6.
- CASAS BAAMONDE, María Emilia, “Reflexiones sobre la reforma sindical (julio 1976 a julio 1977)”, *Cuadernos del Derecho del Trabajo*, nº 3, (1977), pp. 199-251.
- BAYLOS, Antonio y ESCUDERO, Ricardo, “Flexibilidad legislativa y contractualismo en el Derecho del Trabajo español”, *Relaciones Laborales*, nº 23, (1987), pp. 7-36.
- VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Diversidad y precariedad de la contratación temporal en España”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1990), pp. 240-258.
- BAYLOS, Antonio y APARICIO TOVAR, Joaquín, *Legislación de huelga*, Madrid, Tecnos, 1992.
- “La reforma del Derecho del Trabajo. Diez años de legislación laboral: 1985-1995”, *Relaciones Laborales*, nº 1-2, (1996), pp. 60-82.
- CASPISTEGUI, Francisco Javier, “La llegada del concepto de cultura política a la historiografía española” en CARRERAS, Juan José y FORCADELL, Carlos (eds.), *Usos públicos de la historia: ponencias del VI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea [6º, 2002, Zaragoza]*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza / Marcial Pons, 2003.
- “La llegada del concepto de cultura política a la historiografía española” en CARRERAS, Juan José y FORCADELL, Carlos (ed.), *Usos de la historia y políticas de memoria [6º, 2002, Zaragoza]*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 167-186.
- “Los matices de la modernización bajo el franquismo” en MATEOS, Abdón y HERRERÍN, Ángel (eds.), *La España del presente: de la dictadura a la democracia*, Madrid, UNED, 2006, pp. 251-270.
- “Más allá de su oficio, el historiador en sociedad” en PEIRÓ MARTÍN, Ignacio (ed.), *La(s) Responsabilidad(es) del Historiador*. Dossier monográfico, *Alcores. Revista de Historia Contemporánea*, nº 1, (2006), pp. 63-93.

CASQUEL, Elena, *The causes and consequences of temporary jobs in Spain: a theoretical-empirical approach*, Valencia, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 2004.

CASTAÑER, Xavier, “La política industrial. Ajustes, nuevas políticas horizontales y privatización: 1975-1996” en GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), (coords.), *Políticas públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno*, Barcelona, Ariel, 1998, pp. 79-112.

CASTEJÓN VILELLA, Emilio, “Accidentalidad laboral en España: algunos resultados de la explotación del nuevo parte de accidentes de trabajo”, *Salud y Trabajo*, nº 90, (1992), pp. 4-11.

- CRESPIÁN, Xavier, “Accidentes de trabajo: [casi] todos los porqués”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, vol. XXV, nº 1, (2007), pp. 13-57.

CASTEL, Robert, *Les métamorphoses de la question sociale: une chronique du salariat*, Paris, Arthème Fayard, 1995.

- “¿Por qué la clase obrera ha perdido la partida?” en DÍAZ-SALAZAR, Rafael (ed.), *Trabajadores precarios. El proletario del Siglo XXI*. Madrid, HOAC, 2003, pp. 169-179.
- *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Buenos Aires, Paidós, 2004.
- *Le montée des incertitudes: Travail, protections, statut de l'individu*, Paris, Éditions du Seuil / Les Couleur des Idées, 2009.
- *El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatutos del individuo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010.

CASTELLANO, Pablo, *Sobre el Partido Obrero*, Barcelona, El Viejo Topo, 1979.

- *Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias*, Madrid, Temas de Hoy, 1994.
- *Gota a gota*, Madrid, EILEA, 1996.
- *Por Dios, por la patria y el rey: una visión crítica de la transición española*, Madrid, Temas de Hoy, 2011.

CASTELLANOS LÓPEZ, José Antonio, “De consensos, rupturas y nuevas historias: una visión de la transición desde la España actual” en GONZÁLEZ MADRID, Damián A. (coord.), *El franquismo y la transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, pp. 154-178.

CASTELLS, Manuel [et al.], *Nuevas tecnologías, economía y sociedad en España*, II vols., Madrid, Alianza, 1986.

- *El impacto de las nuevas tecnologías en la economía internacional: implicaciones para la economía española*, Madrid, Instituto de Estudios de Prospectiva, 1990.
- *Crisis urbana y cambio social*, Madrid, Siglo XXI, 1991.
- PÉREZ ORTIZ, Lourdes, *Análisis de las políticas de vejez en España en el contexto europeo*, Madrid, Instituto Nacional de Servicios Sociales, 1992.
- (dir.) y VÁZQUEZ, Juan Antonio (coord.), *Estrategias para la reindustrialización de Asturias*, Madrid, Civitas / Principado de Asturias, 1994.
- *La era de la información: economía, sociedad y cultura*, III vols., Madrid, Alianza, 2000, vol. I, *La sociedad red*.

CASTELLS ARTECHE, Luis, “La historia de la vida cotidiana” en HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y LANGA, Alicia (eds.), *Sobre la historia actual. Entre política y cultura*, Madrid, Abada, 2005, pp. 37-62.

CASTELLS i OLIVERES, Antoni [et al.], *Una alternativa fiscal para España*, Madrid, Exlibris / Fundación Alternativas, [2002].

CASTILLO, Juan José, *Las nuevas formas de organización del trabajo: viejos retos de nuestro tiempo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.

- (comp.), *La automatización y el futuro del trabajo. Tecnologías, organización y condiciones de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.

- “Nuevas tecnologías y condiciones de trabajo” en BAYLOS, Antonio [et al.], *Nuevas tecnologías y clase obrera*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1989, pp. 149-166.
 - PRIETO, Carlos, *Condiciones de trabajo. Un enfoque renovador de la sociología del trabajo*, Madrid, CIS, 1990 [1983].
 - “El significado del trabajo hoy”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 82, (1998), pp. 215-320.
 - “Reestructuración productiva y organización del trabajo” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999 [1991], pp. 23-42.
 - (ed.), *El trabajo del futuro*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1999, pp. 13-40.
 - LÓPEZ CALLE, Pablo, *Los obreros del Polo: una cadena de montaje en el territorio*, Madrid, Editorial Complutense, 2003.
 - *Los estragos de la subcontratación: la organización del trabajo como factor de riesgo laboral*, Madrid, Secretaria de Comunicación e Imagen de UGT-Madrid, 2004.
 - *El trabajo fluido en la sociedad de la información: organización y división del trabajo en las fábricas de software*, Madrid, Miño y Dávila, 2007.
 - *La soledad del trabajador globalizado. Memoria, presente y futuro*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008.
 - LÓPEZ CALLE, Pablo, “Modelos productivos, salud laboral y políticas de prevención: el caso español”, *Revista la Mutua*, nº 21, (2009), pp. 27-48.
 - AGULLÓ, Itziar, *Trabajo y vida en la sociedad de la información. Un distrito tecnológico en el Norte de Madrid*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2012.
- CASTILLO, Pilar del (ed.), *Comportamiento político y electoral*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995.
- CRESPO, Ismael (eds.), *Cultura Política. Enfoques teóricos y análisis empíricos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1997.
- CASTILLO, Santiago (coord.), *La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas [Actas del I Congreso de la Asociación de Historia Social, Zaragoza, 1990]*, Madrid, Siglo XXI, 1991.
- OLIVER, Pedro (coords.), *Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y marginados [V Congreso de Historia Social, noviembre de 2006]*, Madrid, Siglo XXI, 2007.
- CASTILLO HERMOSA, Jaime del, “Regiones industrializadas en declive: el caso del Norte de España”, *Información Comercial Española*, nº 645, (1987), pp. 9-18
- CASTILLO CASTILLO, José, *La emigración española en la encrucijada. Estudio empírico de la emigración de retorno*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981.
- *Sociedad de consumo a la española*, Madrid, EUDOMA, 1987.
- CASTRO, Carles, “La minoría dominante: la derrota de la mayoría sociológica”, *Claves de Razón Práctica*, nº 194, (2009), pp. 64-67.
- *Relato electoral de España (1977-2007): las claves de la alternancia en el poder durante tres décadas de monarquía parlamentaria*, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2008.
- CASTRO PERICACHO, Carlos de, “La influencia de las expectativas en la organización temporal de la vida” en *Las nuevas formas familiares del siglo XXI*. Dossier monográfico, *Política y sociedad*, vol. XXXLIV, nº 2, (2008), pp. 169-188.
- CATALÁN, Jordi, “Del «milagro» a la crisis: la herencia económica del franquismo” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 95-132.
- CAUSSA, Martí, “La LCR y la izquierda radical (1966-1975)”, *Viento del Sur*, nº 115, (2011), pp. 49-55.

CAVAS MARTÍNEZ, Faustino y FERNÁNEZ ORRICO, Francisco Javier, “La protección social por desempleo en el sistema constitucional de relaciones laborales” en SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente (dir.) y MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Rodrigo (coord.), *El modelo social en la Constitución española de 1978*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, pp. 911-960.

CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio, “Orden, progreso y sindicalismo: cómo vieron las autoridades franquistas el cambio socio-económico” en TOWSON, Nigel (coord.), *España en cambio: el segundo franquismo, 1959-1975*, Madrid, Siglo XXI, 2009, pp. 87-102.

- *Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953)*, Madrid, Marcial Pons, 2000.

CCOO. SECRETARIA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de la Moncloa al AES*, Madrid, Confederación Sindical de CCOO / Secretaria Confederal de Formación y Cultura, 1989.

- *Situación económica y presupuesto del Estado para 1992: octubre 1991*, Madrid, Confederación Sindical de CCOO / Secretaria de Información y Publicaciones, 1991.
- GABINETE DE SALUD LABORAL [MURIE, Fiona y MARTÍN, Carlos (coords.)], *Informe a la DGV sobre el proyecto: Impacto de la transposición de las Directivas de la Unión Europea relativas a la Seguridad y Salud en España*, Madrid, CCOO, 1996.
- “El sistema de protección al desempleo. Notas generales sobre la situación en 2001”, *Cuadernos de Información Sindical*, nº 23, (2001).

CEBRIÁN, Inmaculada, GARCÍA, Carlos, MURO, Juan, TOHARIA, Luis y VILLAGÓMEZ, Elizabeth, *Protección social y acceso al empleo: un estudio de los perceptores por desempleo*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996.

- *El salario mínimo y sus efectos sobre el mercado de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010.

CENTENO, Roberto, *El petróleo y la crisis mundial. Génesis, evolución y consecuencias del nuevo orden petrolero internacional*, Madrid, Alianza, 1982.

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, *Cotización, salario y jornada de trabajo*, Madrid, Centro de Estudios Financieros, 1992.

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS, *Postelectoral Elecciones Generales 1982*, Estudio, nº 1327, 1982.

- “La evolución del voto: 1979-1982”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 28, (1984), pp. 305-321.
- *Imagen del sistema de partidos*, Estudio nº 1430, noviembre de 1984.
- *Actitudes y demandas sindicales de los trabajadores españoles: discurso social ante el sindicalismo*, Estudio nº 1771, 1988.
- *Actitudes y opiniones de los españoles ante el Plan de Empleo Juvenil*, Estudio nº 1756, 1988.
- *Debate parlamentario sobre el Estado de la Nación (VI)*, Estudio nº 1793, 1989.
- *Actitud y opiniones de los jóvenes*, Estudio nº 1813, 1989.
- *Barómetro enero 1989*, Estudio nº 1785, 1989.
- *Diez años de gobierno socialista*, Estudio nº 2024, 1992.
- *Transición y democracia*, Estudio nº 2201, 1995.
- *25 años después*. Estudio nº 2401, 2000.
- *Recuerdo de la transición española*, Estudio nº 2252, 2001.
- *Barómetro de octubre 2005*, Estudio nº 2622, 2005.

CEOE, *La economía española y los presupuestos para 1982*, Madrid, CEOE, 1981.

- *Una nueva política de empleo: I Bases para una política de empleo; II. Propuesta de medidas*, Madrid, CEOE, 1981.

- *Bases para un programa a medio plazo de la economía española (La competitividad como objetivo)*, Madrid, CEOE, 1983.
- *Acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de la CEOE*, Madrid, CEOE, 1992.
- CEOE y CEPYME, *Conferencia empresarial 1992. La empresa española en la nueva Europa. Intervenciones, 30 y 31 de enero*, Madrid, CEOE, 1992.
- CERCAS, Javier, *Anatomía de un instante*, Barcelona, Mondadori, 2009.
- CERNUDA, Pilar, *El presidente*, Madrid, Temas de Hoy, 1994.
- *Crónicas de la crispación: una visión personal del fin del felipismo*, Madrid, Temas de Hoy, 1996.
- CERVIÑO CUERVA, Emma, *Políticas de representación sindical: UGT y CCOO ante el empleo temporal (1977-1997)*, Tesis doctoral, Madrid, Centro de Estudios Avanzados Sociales Juan March, 2003.
- CHAMORRO, Eduardo, *Felipe González: un hombre a la espera*, Barcelona, Planeta, 1980.
- Eduardo, *Viaje al centro de UCD*, Barcelona, Planeta, 1982.
- CHAPUT, Marie-Claude, “Del «parlamento de papel» (1962-1982) al periódico de referencia «El País» (1976-...)” en CAPELLÁN de MIGUEL, Gonzalo y PÉREZ SERRANO, Julio (eds.), *Sociedad de masas, medios de comunicación y opinión pública*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2008, pp. 297-316.
- CHARI, Raj J., “Spanish Socialists, Privatizing the Right Way?” en HEYWOOD, Paul (ed.), *Politics and policy in democratic Spain. No longer different?* London, Frank Cass Publishers, 1999, pp. 163-179.
- CHARTIER, Chantal, “Les enjeux de la nouvelle presse économique de l’Espagne des années 1980”, *Cathiers de civilisation espagnole contemporaine*, nº 8, (2011).
- CHARTIER, Roger, “Historia, lenguaje, percepción. De la historia social de la cultura a la historia cultural de lo social”, *Historia Social*, nº 17, (1993), pp. 97-113.
- CHAUNU, Pierre., *Historia cuantitativa, historia serial*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
- CHAUVEL, Louis, *Le Destin des générations. Structure Sociale et cohortes en France au XXe siècle*, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.
- *Les Classes moyennes à la dérive*, Paris, Seuil, 2006.
- CHAVES, Manuel, “La política de empleo e inserción profesional de los jóvenes: conferencia inaugural”, *Economía y sociología del trabajo*, nº 1-2, (1988).
- “Los sindicatos en la sociedad industrial desarrollada”, *Leviatán*, nº 37, (1990), pp. 25-34.
- “Democracia industrial y relaciones de trabajo”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 183-188.
- CHESNEAUX, Jean, *Du passé faisons table rase?* Paris, Librairie François Maspero, 1976.
- *¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia y de los historiadores*, 6ª ed., Madrid, Siglo XXI, 1984.
- CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier, *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: Hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana*, Madrid, Ediciones Parthenon, 2007.
- CHIRBES, Rafael, “De qué memoria hablamos” en MOLINERO, Carme (ed.), *La transición, treinta años después*, Barcelona, Península, 2006, pp. 238-239.
- CHISLETT, William “The Internationalization of the Spanish Economy”, *Documentos de Trabajo. Elcano Royal Institute of International and Strategic Studies*, 2002.
- CHOMSKY, Noam, CYPHER, James M. y BELLAMY FOSTER, John [et al.], *25 años de neoliberalismo*, Barcelona, Hacer, 2008.
- “Prólogo” en NAVARRO, Vicenç, TORRES LÓPEZ, Juan y GARZÓN ESPINOSA, Alberto, *Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España*, Madrid, Sequitur / ATTAC, 2011, pp. 9-11.
- CHOSSUDOVSKY, Michel, “Crítica del «ajuste estructural»”, *Viento del Sur*, nº 15, (1993), pp. 70-83.

- *The Globalization of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms*, Penang, Third World Network, 1997.
- CHOURAQUI, Jean Claude, “Los déficits públicos en los países de la OCDE: causas, consecuencias y remedios”, *Papeles de Economía Española*, nº 24, (1985), pp. 2-33.
- CILLEROS CONDE, Roberto, “Las consecuencias de las nuevas características del trabajo en la afiliación sindical”, *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, nº 1, (2011), pp. 28-50.
- CLARET, Andreu, “¿Hacia dónde va el Gobierno PSOE?” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista a debate*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1986, pp. 51-57.
- CLAUDÍN, Fernando [et al.], *Teoría socialista del Estado*, Madrid, Mañana, 1978.
- Santiago Carrillo. *Crónica de un secretario general*, Barcelona, Planeta, 1983.
- CLOSA, Carlos, “La cambiante posición de España en la Unión Europea”, *Política y Sociedad*, nº 20, (1995), pp. 111-124.
- (ed.), *La europeización del sistema político español*, Madrid, Istmo, 2001.
- “La europeización del sistema político español” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del sistema político español*, Madrid, Istmo, 2001 pp. 513-524.
- COHEN, Aron, CONGOST, Rosa y LUNA, Pablo L. (coords.), *Pierre Vilar: une histoire totale, une histoire en construction*, Paris, Syllepse, 2006.
- *Pierre Vilar: una historia total, una historia en construcción*, Granada / Valencia, Universidad de Granada / Universidad de Valencia, 2006.
- COHEN, Benjamin J., *Organizing the world's Money: the political economy of international monetary relations*, New York, Basic Books Publishers, 1977.
- COHEN, Daniel, *Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial*, Buenos Aires, Katz, 2007.
- COHEN, Gerald A., *Karl Marx's. Theory of History. A defence*, New Jersey, Princeton University Press, 1978.
- *La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa*, Madrid, Siglo XXI / Fundación Pablo Iglesias, 1986.
- COLECTIVO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES DE EUSKALDUNA, *La batalla de Euskalduna: ejemplo de resistencia obrera*, Madrid, Revolución, 1985.
- COLECTIVO IOE, [ACTIS, Walter, PEREDA, Carlos y PRADA, Miguel A. de], *Condiciones de trabajo de los Jóvenes (1ª fase de investigación). Informe sociológico*, Madrid, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid / Consejo de la Juventud de España, 1989.
- “Los jóvenes ante el trabajo: Cobayas de un nuevo modelo social”, *Documentación Social*, nº 75, (1989), pp. 191-203.
- “La ideología de la modernización o la parábola del asno y la zanahoria”, *Documentación Social*, nº 88, (1992), pp. 77-86.
- “Características de la desigualdad en el Estado español” en *La sociedad de la desigualdad: pobreza y marginación a debate* [Jornadas organizadas por el sindicato ESK-CUIS], Donostia, Tercera Prensa, 1992, pp. 25-37.
- [con la colaboración de MATEOS, Emma], *Barómetro social de España: análisis del periodo 1994-2006: a partir de un sistema de indicadores*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008.
- COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID (ed.), *Psicología, trabajo, organización y nuevas formas de empleo: 1º Congreso Iberoamericano y 3º Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones: Madrid, 23-26 marzo 1988*, II vols., Madrid, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 1988, vol. I, *Libro de simposios*.
- COLINA ROBLEDO, Antonio, *La cotización de las empresas a la Seguridad Social*, Valencia, CISS, 1998.

COLL, Sebastián, “La nueva historia económica y su influencia en España” en RUEDA HERNÁZ, Germán (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, Universidad de Cantabria / Asamblea Regional de Cantabria, 1991, pp. 69-120.

- FORTEA, José Ignacio, *Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica de España*, II vols., Madrid, Banco de España, 1995.

COLLADO, Juan Carlos y FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “Situación, interpretaciones y opciones de política económica”, *Sistema*, nº 89, (1989), pp. 17-28.

- y id. “Recuperación económica y política de redistribución en España: 1986-1989”, *Sistema*, nº 97, (1990), pp. 11-28.

COLLADO GARCÍA, Luis y PIQUERAS PIQUERAS, M^a del Carmen, *El subsidio por desempleo: un estudio del nivel asistencial de protección*, Madrid, Trotta, 1997.

COLLER, Xavier, “Sindicatos y transformación social” en *Las relaciones laborales en una economía globalizada*. Dossier monográfico, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 27-28, (1995), pp. 154-168.

- *La empresa flexible. Estudio sociológico del impacto de la flexibilidad en el proceso de trabajo*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1997.

COLOMER, Josep M^a, *La transición a la democracia: el modelo español*, Barcelona, Anagrama, 1999

COMAS ARNAU, Domingo, *El uso de las drogas en la juventud*, vol. IV, dentro de ZARRAGA, José Luis (dir.), *Informe Juventud de España 1985. La inserción de los jóvenes en la sociedad*, VII vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 1985.

- “El canon generacional: una aproximación topológica”, *Sistema*, nº 178, (2004), pp. 3-39.
- “La generación premeditada y la sociedad tecnológica: el cambio social y la necesaria adaptación conceptual”, *Sistema*, nº 197-198, (2007), pp. 121-142.
- *Las políticas de juventud en la España democrática*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2007.
- *Estado de la salud de la juventud*, vol. III, dentro de, *Informe 2008: Juventud en España. Jóvenes en una sociedad cambiante: demografía y transiciones a la vida adulta*, V vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 2009.

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS, *El contenido de los Convenios Colectivos: contenido normativo y contenido obligacional* [II Jornadas de Estudios sobre Negociación Colectiva, Madrid 24 y 25 de noviembre 1988], Madrid, Ministerio de Trabajos y Seguridad Social, 1990.

- *Los problemas actuales de la negociación colectiva* [VI Jornadas de Estudio sobre la Negociación Colectiva, Madrid, 3 de junio de 1993], Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994.
- *Empleo, contratación y negociación colectiva* [XI Jornadas de Estudio sobre la Negociación Colectiva, Madrid, 4 y 5 de junio de 1998], Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / Subdirección General de Publicaciones, 1999.
- *Estado social y autonomía colectiva: 25 años de negociación colectiva en España* [XVII Jornadas de estudio sobre negociación colectiva, Madrid 17 y 18 de junio de 2004], Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / Subdirección General de Publicaciones, 2006.

COMISIÓN EUROPEA, “Capítulo III del estudio comparado sobre la legislación laboral en la CEE realizado por la Comisión Europea en 1989/1990”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 15-16, (1992), pp. 245-257.

- *Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI: Libro Blanco*, II vols., Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1993.
- EUROSTAT, *Europa de los quince: cifras claves*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000.
- DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y ASUNTO SOCIALES, *Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo (EEAT): metodología*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2002.

COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA JUVENTUD Y LA INFANCIA, *Plan Integral de juventud: políticas para la generación de los 90*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1992.

COMISIÓN PROGRAMA 2000, *La economía española a debate*, Madrid, Siglo XXI, 1988; id., *Aspectos y problemas de la vida política española*, Madrid, Siglo XXI, 1988.

- *Evolución y crisis de la ideología de izquierdas*, Madrid, Siglo XXI / Fundación Pablo Iglesias, 1988.
- *La sociedad española en transformación: escenarios para el año 2000*, Madrid, Siglo XXI / Fundación Pablo Iglesias, 1988.

COMÍN, Francisco MARTÍN ACEÑA, Pablo y JIMÉNEZ, Juan Carlos, “Problemas actuales de la empresa pública en España”, *Papeles de Economía Española*, nº 52/53, (1990), pp. 231-246.

- “Las aportaciones de Enrique Fuentes Quintana a la historia de la Hacienda Pública Española”, *Hacienda Pública Española*, nº 2, (1994) pp. 43-56.
- ZAFRA, Juan (eds.), *El fraude fiscal en la Historia de España*. Dossier monográfico *Hacienda Pública Española*, nº I extra, (1994).
- “El fraude fiscal en la Historia: un planteamiento de sus fases” en id. y ZAFRA, Juan (eds.), *El fraude fiscal en la Historia de España*. Dossier monográfico *Hacienda Pública Española*, nº I extra, (1994), pp. 31-46.
- “El papel del presupuesto en el crecimiento económico español: una visión a largo plazo”, *Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic History*, vol. XII, nº 2, (1994), pp. 311-316.
- “La empresa pública en España contemporánea: formas históricas de organización y gestión (1977-1995)”, *Documento de Trabajo. Fundación Empresa Pública*, nº 9505, (1995).
- “La difícil convergencia de la economía española: un problema histórico”, *Papeles de Economía Española*, nº 63, (1995), pp. 78-92.
- *Historia de la Hacienda Pública*, II vols., Barcelona, Crítica, 1996, vol. II, *España (1808-1995)*.
- MARTÍN ACEÑA, Pablo (eds.), *La empresa en la historia de España*, Madrid, Civitas, 1996.
- y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2ª ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 872-964.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *La protección social en Europa*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidades Europeas, 1994.

- *Política social europea, un paso adelante para la Unión*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1994.
- *Informe de la Comisión: Estado de la aplicación de la Directiva 93/104/CE de 23 de noviembre de 1993 relativa a determinados aspectos de la ordenación de trabajo (Directiva del tiempo de trabajo)*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, “Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto: España. Adición. Comentarios del Gobierno de España sobre las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos”, Documento de las Naciones Unidas, CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1, 13 de enero de 2009 [original en poder del autor].

COMUNIDAD EUROPEA, “La evolución de los conflictos laborales en la Comunidad Europea”, *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, nº 10, (1993), pp. 139-143.

CONDE, Fernando, *Las relaciones personales y familiares de los jóvenes*, vol. III, dentro de ZARRAGA, José Luis (dir.), *Informe Juventud de España 1985. La inserción de los jóvenes en la sociedad*, VII vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 1985.

CONDE, Mario, *Memorias de un preso*, Madrid, Martínez Roca, 2009.

CONRAD, Alfred H. y MEYER, John, *The Economics of Slavery and Other Studies in Econometric History*, Chicago, Aldine Publishing, 1964.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA, *Bases para una política de empleo juvenil*, Madrid, Consejo de la Juventud de España, 1990.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, “Dictamen del Consejo Económico y Social sobre la actualización del Programa de Convergencia”, Madrid, 21 de septiembre de 1994 [*Dictamen 6/1994*].

- (ed.), *La duración del contrato de trabajo*, Madrid, Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, 1996.
- *El trabajo a tiempo parcial*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996.
- *La pobreza y la exclusión social en España*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1997.
- *Desequilibrios ocupacionales y políticas activas de empleo [sesión ordinaria del Pleno de 26 de enero de 2005]*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2005.
- *El papel de la juventud en el sistema productivo español*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2005 [*Sesión ordinaria del Pleno de 21 de diciembre de 2005*].

CONSEJO SUPERIOR DE ESTADÍSTICA / GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS COYUNTURALES DEL MERCADO DE TRABAJO, *Comparación de datos de empleo y paro (documentos aprobados en el pleno del Consejo Superior de Estadística del 3 de noviembre de 1999)*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1999.

CONSELL ECONÓMIC DE LES ILLES BALEARS, *Indicadors de qualitat del treball*, Palma de Mallorca, Consell Econòmic de les Illes Balears, 2008.

CONTRERAS GARCÍA, Delia, *Análisis del tratamiento periodístico de las negociaciones de Maastricht en la prensa española*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2004.

CORAL GUERRERO, Luis, “Sistema básico de la imposición directa”, *Cuadernos de Estudios Empresariales*, nº 11, (2001), pp. 87-116.

CORCUERA, José Luis [et al.], “Nuevas políticas sectoriales ante la crisis económica” en GUERRA, Alfonso CABALLERO, Abel y TEZANOS, José Félix (eds.), *La socialdemocracia ante la economía de los años noventa*, Madrid, Sistema, 1994, pp. 137-174.

CORIAT, Benjamin, *El taller y el robot. Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era electrónica*, Madrid, Siglo XXI, 1993.

- “Las nuevas dimensiones de la competitividad: Hacia un enfoque europeo”, *IPTS report*, 1997 [original en poder del autor].
- PETIT, Pascal y SCHMÉDER, Geneviève (eds.), *The Hardship of Nations. Exploring the Paths of Modern Capitalism*, Glos / Massachusetts, Edward Elgar Publishing, 2006.
- “Social-institutional changes in the post-Fordist era” en id., PETIT, Pascal y SCHMÉDER, Geneviève (eds.), *The Hardship of Nations. Exploring the Paths of Modern Capitalism*, Glos / Massachusetts, Edward Elgar Publishing, 2006, pp. 103-122.

CORONA RAMÓN, Juan Francisco, “La ilusión de la deuda pública”, *Cuadernos de Economía*, vol. XIV, nº 41, (1986), pp. 569-575.

CORREA CARRASCO, Manuel, *La negociación colectiva como fuente del derecho del trabajo*, Madrid, Universidad Carlos III / Boletín Oficial del Estado, 1997.

CORTÉS ALCALÁ, Luis, “La modernización de la sociedad española”, *Documentación Social*, nº 88, (1992), pp. 57-76.

CORTES GENERALES, *El impuesto sobre el valor añadido. Proyecto de Ley y memoria*, 1985, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1985.

- *Debates parlamentarios sobre empleo y economía irregular (1986-1988)*, VII vols., Madrid, Congreso de los Diputados / Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General / Gabinete de Publicaciones, 1988.
- *Proyecto de Ley Orgánica de Huelga*, Barcelona, Difusora de Normas Jurídicas, 1993.

CORTES GENERALES. CONGRESO DE DIPUTADOS, *Fraude fiscal* (documentación preparada para la tramitación de los Proyectos de Ley: Represión del Fraude fiscal) [BOCG Congreso, 7 septiembre 1984], *Reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública* [BOCG Congreso, 11 de septiembre de 1984], Madrid, Secretaria General / Centro de Estudios y Documentación / Congreso de los Diputados, 1984.

- *Informe de la ponencia para el análisis y de los problemas estructurales del Sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse. Pacto de Toledo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1996.

CORTES GENERALES. SENADO, *Informe de la ponencia sobre siniestralidad laboral en el sector de la construcción en España*, Madrid, Secretaria General del Senado, Servicio de Publicaciones, 1995.

CORTS GRAU, José [et al.], *Política y sociedad: estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol*, II vols., Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1987.

COSSALTER, Fabrizio, “Quaderni Rossi: entre teoría y praxis de la autonomía obrera” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio, *La clase trabajadora, después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 26/27 (2008), pp. 281-289.

COSTA, Francisco, “La nueva historia intelectual en el escenario posmoderno: principales formas y presupuestos heurísticos” en ORTEGA LÓPEZ, Teresa Mª (coord.), *Por una historia global: el debate historiográfico en los últimos tiempos*, Granada, Universidad de Granada / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 291-318.

COSTAS, Antón y NONELL, Rosa, “Organización de los intereses económicos, función empresarial y política económica en España. El caso de la CEOE” en COMÍN, Francisco y MARTÍN ACEÑA, Pablo (eds.), *La empresa en la historia de España*, Madrid, Civitas, 1996, pp. 457-471.

COSCUBIELA, Joan, *Diálogo y concertación social en la España de las autonomías*, Madrid, GPS, 2006.

COTARELO, Ramón, (comp.), *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992,

- CUEVAS, Juan Carlos (comps.), *El cuarto poder: medios de comunicación y legitimación democrática en España*, Medilla, UNED-Melilla / Servicio de Publicaciones, 1998.
- *El sueño de la verdad. Los conflictos en la sociedad abierta*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2012.

COUZENS, Kenneth, “La política económica de Gran Bretaña bajo el gobierno de Margaret Thatcher”, *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, nº 4, (1982), pp. 113-136.

CRAIG, Calhoun, *Critical Social Theory. Culture, History, and the Challenge of Difference*, Oxford, Blackwell, 1995.

CRAIG, Patricia, “Political mediation, traditional parties and new social movements: Lessons from the Spanish Socialist Worker's Party”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 65, (1995).

CRESPO, Eduardo, PRIETO, Carlos y SERRANO, Amparo (coords.), *Trabajo, subjetividad y ciudadanía: paradojas del empleo en una sociedad en transformación*, Madrid, Editorial Complutense / Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009.

CRiado OLMOS, Henar, “Strategic mobilization under uncertainty: The logic of PSOE mobilization strategies in the 1996 Spanish electoral campaign”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 181, (2002).

CRISTÓBAL CRISTÓBAL, Alfredo, “La Encuesta de Población Activa y la Contabilidad Nacional de España”, *Índice: revista de estadística y sociedad*, nº 11, (2005), pp. 16-17.

CROISSIER, Luis Carlos [et al.], *Economía y socialismo*, Madrid, Mañana Editorial, 1978.

- “INI: estrategia para recuperar rentabilidad”, *Economía industrial*, nº 241, (1985), pp. 23-32.
- “Aquello duro seis años, 1982-1988”, *Dirección y progreso*, nº 185, (2002), pp. 19-24.

CROZIER, Michel, “Qu'est-ce que la classe ouvrière française?”, *Arguments*, número especial, (1959).

CRUZ ARTACHO, Salvador y PONCE ALBERCA, Julio (coords.), *El mundo del trabajo en la conquista de las libertades*, Jaén, Publicaciones de la Universidad de Jaén, 2011.

CRUZ CASTRO, Laura, *Gobiernos, mercado de trabajo y formación profesional: un análisis comparativo de España y Gran Bretaña*, Tesis Doctoral, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 2000.

CRUZ FERRER, Juan de la, *La liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico: modelos y análisis de la Ley 54-1997*, Madrid, Marcial Pons, 1999.

CRUZ MARTÍNEZ, Rafael, “El mitin y el motín. La acción colectiva y los movimientos sociales en la España del siglo XX”, *Historia Social*, nº 31, (1998), pp. 137-152.

- “La sangre en España. Lecturas sobre historia de la violencia política en el siglo XX”, *Ayer*, nº 46, (2002), pp. 285-293.
- “El órgano de la clase obrera. Los significados de movimiento obrero en la España del siglo XX”, *Historia Social*, nº 53, (2005), pp. 155-174.

CRUZ PADIAL, Ignacio, *Comentario a la Ley y Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones Donaciones*, Málaga, Departamento de Derecho Financiero, Facultad de Derecho, 1994.

CRUZ ROCHE, Ignacio, DESDENTADO, Aurelio y RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, *Política social y crisis económica. Aproximación a la experiencia española*, Madrid, Siglo XXI, 1985.

- “Cotizaciones a la Seguridad Social y coste factor trabajo” en CARABAÑA MORALES, Julio (coord.) y GARRIDO, Luis (ed.), *Reparto de trabajo y crisis social*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 171-182.

CRUZ RUBIO, M^a y RUIZ FRANCO, M^a Rosario, “La investigación histórica sobre el franquismo: un análisis bibliométrico de las revistas españolas (1976-1992)”, *Hispania*, vol. LIV, nº 187, (1994), pp. 661-676.

CRUZ RUIZ, Juan, *Una memoria de ‘El País’*, Barcelona, Plaza & Janés, 1996.

CRUZ VILLALÓN, Jesús, “El reconocimiento legal de la representación y la acción sindicales en la empresa” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Libertad Sindical: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto*, Madrid, Tecnos, 1985.

- DURÁN LÓPEZ, Federico, JIMENO, Juan Francisco, OLALLA, Miguel Ángel, RUESGA, Santos M., SÁEZ, Carmen, TOHARIA, Luis y VALDÉS DAL-RE, Fernando, *Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas. Informe de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.
- FERRANDS CARAMÉS, Carmen, *Negociación sobre el tiempo de trabajo*, Sevilla, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2007.
- *Eficacia de las normas laborales desde la perspectiva de la calidad del empleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.

CUADRA, Bonifacio de la y GALLEGU-DÍAZ, Soledad, *Del consenso al desencanto*, Madrid, Saltés, 1981.

CUADRADO, Pilar, LACUESTA, Aitor, MARTÍNEZ, José M^a y PÉREZ, Eduardo, “El futuro de la tasa de actividad española: un enfoque generacional”, *Documentos de Trabajo del Banco de España*, nº 0732, (2007).

CUADRADO ROURA, Juan Ramón y VILLENA PEÑA, José E., *Política de rentas. Objetivos e instrumentación. Experiencia internacional. El caso español*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980.

- “La expansión de los servicios en el contexto del cambio estructural de la economía española” en *Papeles de Economía Española*, nº 42, (1990), pp. 98-122.
- DURÁ JUEZ, Pedro, “Las privatizaciones en España y el Consejo Consultivo de Privatizaciones” en JORDÁN, Josep M^a y SÁNCHEZ ANDRÉS, Antonio (coords.), *Desafíos actuales de la política económica: un enfoque estructural y social*, Navarra, Thomson Civitas, 2008, pp. 99-132.

CUENCA GARCÍA, Alain, SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Antonio, BANDRÉS MOLINA, Eduardo y GADEA RIVAS, M^a Dolores, “El desarrollo del estado del bienestar moderno en el sur de Europa” en MARAVALL, José M^a (ed.), *Dimensiones de la desigualdad: III simposio sobre igualdad y distribución de la renta y la riqueza*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1999, vol. I, pp. 89-150.

CUENCA TORIBIO, José Manuel “Felipismo y Miterrandismo, un paralelo”, *Hispania*, vol. LI/3, n° 179, (1991), pp. 1095-1102.

- y MIRANDA, Soledad, *El poder y sus hombres: ¿por quienes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998)*, Madrid, Actas, 1998.

- *Conversaciones con Alfonso Armada: el 23F*, Madrid, Actas, 2001.

CUERVO, Álvaro, *La privatización de la empresa pública*, Madrid, Encuentro, 1997.

- *La crisis bancaria en España, 1977-1985: causas, sistema de tratamiento y coste*, Barcelona, Ariel, 1988.

DAHRENDORF, Ralf, *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*, Madrid, Rialp, 1979.

- *El conflicto social moderno: ensayo sobre la política de la libertad*, Madrid, Mondadori, 1990.

- “El nuevo subproletariado” DÍAZ-SALAZAR, Rafael (ed.), *Trabajadores precarios. El proletario del Siglo XXI*. Madrid, HOAC, 2003, pp. 127-135.

DARCY, R y ROHRS, Richard, *A guide to quantitative history*, Westpor (Connecticut), Praeger, 1995.

DARO CANCELA, Diego, *Las primeras elecciones autonómicas de Andalucía: 1982*, Cádiz, Grupo de Investigación «Historia Contemporánea», 1992.

DAVIDSON, Paul, *The Keynes solution: the path to global economic prosperity*, New York, Palgrave Macmillan, 2008.

DEHESA, Guillermo de la, “Ajuste externo y tipo de cambio”, *Papeles de Economía Española*, n° 15, (1983), pp. 282-304.

- “Tipo de cambio, tipo de interés y movimientos del capital”, *Economistas*, vol. II, n° 11, (1984), pp. 46-50.

- “La política económica frente a la crisis”, *Información Comercial Española*, n° 617-618, (1985), pp. 7-18.

- “Balanza de pagos y tipos de cambio de la peseta”, *Economistas*, vol. III, n° 17, (1985), pp. 25-30.

- et al., *Las inversiones extranjeras en España y españolas en el exterior*, Barcelona, Orbis, 1987.

- “La integración de la peseta en el Sistema Monetario Europeo: el gran dilema de la política económica española”, *Información Comercial Española*, n° 657, (1988), pp. 141-148.

- “Los límites de la política económica española”, *Leviatán*, n° 32, (1989), pp. 27-37.

- “El Programa de Convergencia”, *Boletín Económico de la ICE*, n° 2324, (1992), pp. 1529-1530.

- “Por qué el ajuste es inevitable”, *Economistas*, vol. X, n° 54, (1992), pp. 10-14.

- “Las privatizaciones en España”, *Moneda y Crédito*, n° 196, (1993), pp. 55-71.

- *Lecturas de política económica española*, A Coruña, Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza [1999].

- “Balance de la economía española en los últimos veinticinco años”, *Información Comercial Española*, n° 811, (2005), pp. 53-79.

- “Perspectivas de empleo y la productividad en España”, *Información Comercial Española*, n° 826, (2005), pp. 483-500.

DELGADO, Santiago y VÉLEZ, Antonio J. (eds.), *El futuro del sindicalismo*, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1996.

DELGADO, Santiago y SÁNCHEZ MILLAS, M^a del Pilar, *Francisco Fernández Ordóñez: un político para la España necesaria: 1930-1992*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.

DELGADO-IRIBARREN, Manuel, “El Plan Energético Nacional (P.E.N.) 1983”, *Revista de Administración Pública*, n° 104, (1984), pp. 449-462.

DELGADO LOBO, M^a Luisa, *Estado y fiscalidad: los costes de la declaración de la renta en España*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1995.

DELGADO SOTILLOS, Irene y LÓPEZ NIETO, Lourdes, *Comportamientos políticos, partidos grupos de presión: sociología electoral*, Madrid, UNED, 1993.

- *El comportamiento electoral municipal español, 1979-1995*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI 1997.
- “Elites políticas y vida parlamentaria: actividades y motivaciones de los diputados españoles” en MARTÍNEZ, Antonia (ed.), *El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimiento*, Madrid, Tecnos, 2000, pp. 295-342.

DELL'ANNO, Roberto, GÓMEZ, Miguel y ALAÑO, Ángel, “The shadow economy in three Mediterranean countries: France, Spain and Greece”, *Empirical Economics*, vol. XXXIII, n° 1, (2007), pp. 111-130.

DEJUÁN, Oscar, “La constitución económica española de 1978 y el PSOE”, *Sistema*, n° 53, (1983), pp. 95-106.

DERTHICK, Martha y QUIRK, Paul, J., *The Politics of Deregulation*, Washington (DC), Brookings Institution Press, 1995.

DESTENTADO, Aurelio, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio, “Las medidas laborales en la Reconversión Industrial” en *Economía Industrial*, n° 232, (1983), pp. 51-64

- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Bernardo y GONZÁLEZ-SÁNCHO LÓPEZ, Emilio, *La reforma de las pensiones de la Seguridad Social: un comentario sistemático a la Ley 26/1985, de 31 de julio*, Madrid, Civitas, 1986.
- “Las prestaciones de desempleo: 1974-1985”, *Información Comercial Española*, n° 630-631, (1986), pp. 152-164.

DEVIN, Guillaume, *L'Internationale socialiste: histoire et sociologie du socialisme international (1945-1990)*, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1992.

DÍAZ, A. y ROMERO, Desiderio, “Evaluación del fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido”, *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, n° 8, (1993).

DÍAZ, Elías, “Marxismo y no marxismo: Las señas de identidad del Partido Socialista Obrero Español”, *Sistema*, n° 29-30, (1979), pp. 211-232.

- *Notas para la historia del pensamiento español actual*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978.
- El lado oscuro de la dialéctica: Consideraciones sobre el XXXVIII Congreso del PSOE”, *Sistema*, n° 32, (1979), pp. 35-50.
- “El Estado Democrático de Derecho en la Constitución española de 1978”, *Sistema*, n° 41, (1981), pp. 41-86.
- *Socialismo en España: el partido y el estado*, Madrid, Mezquita, 1982.
- *Estado de Derecho y sociedad democrática*, Madrid, Taurus, 1984.
- “Pensamiento socialista durante el franquismo” en JULIÁ, Santos (coord.), *El socialismo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 367-399.
- “Ideologies in the Making of the Spanish Transition” en HEYWOOD, Paul (ed.), *Politics and policy in democratic Spain. No longer different?* London, Frank Cass Publishers, 1999, pp. 26-39
- *De la Institución a la Constitución: política y cultura en la España del siglo XX*, Madrid, Trotta, 2009.

- *La democracia en España: el legado socialista de la Ilustración*, Madrid, Fundación Alternativas, 2011.
- DÍAZ CARDIEL, Víctor [et al.], *Madrid en huelga: enero 1976*, Madrid, Ayuso, 1976.
- DÍAZ de RADA, Vidal, *Pautas de consumo y ahorro en los albores del siglo XXI*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001.
- DÍAZ GONZÁLEZ, Enrique, *Rumasa*, Barcelona, Planeta, 1983.
- DÍAZ FUENTES, Daniel, “Fraude y amnistías fiscales en la España contemporánea, 1940-1990” en COMÍN, Francisco y ZAFRA, Juan (eds.), *El fraude fiscal en la Historia de España*. Dossier monográfico *Hacienda Pública Española*, nº I extra, (1994), pp. 389-402.
- DÍAZ HERRERA, José y TIJERAS, Ramón, *El dinero del poder. La trama económica en la España socialista*, 6ª ed., Madrid, Cambio 16, 1991.
- DURÁN, Isabel, *Los secretos del poder: del legado franquista al ocaso del felipismo. Episodios inconfesables*, Madrid, Temas de Hoy, 1994.
- DÍAZ-DELGADO LEZA, Javier, “Morir de éxito. Las técnicas y estrategias electorales del PSOE como factor explicativo de su triunfo en las urnas. La campaña electoral de 1982 como culminación de un éxito” en *Historia de la Época Socialista. Congreso Internacional. España: 1982-1996* [comunicación].
- DÍAZ NOSTY, Bernardo, *La irresistible ascensión de Juan March: notas previas para una investigación biográfica*, Madrid, Sidmay, 1977.
- DÍAZ-SALAZAR, Rafael (ed.), *Trabajadores precarios. El proletario del Siglo XXI*, Madrid, HOAC, 2003.
- “Trabajadores precarios: el proletario del siglo XXI” en id. (ed.), *Trabajadores precarios. El proletario del Siglo XXI*, Madrid, HOAC, 2003, pp. 67-108.
- DÍAZ-VARELA, Mar y GUINDAL, Mariano, *A la sombra del poder. CEOE el partido de los patronos: desde la transición económica, y el posterior manejo del PP, hasta el desengaño con el PSOE*, Barcelona, Tibidabo, 1990.
- DIEGO ROMERO, Javier de, “El concepto de ‘cultura política’ en ciencia política y sus implicaciones para la historia”, *Ayer*, nº 61 (2006), pp. 233-266.
- DIÉGUEZ CUERVO, Gonzalo, “Estabilidad en el empleo y contrato temporales”, *Civitas*, nº 2, (1980), pp. 185-196.
- “Aplicaciones del derecho de huelga en el Proyecto”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, nº 17, (1993), pp. 59-63.
- DÍEZ, Fernando, *Utilidad, deseo y virtud. La formación de la idea moderna de trabajo*, Barcelona, Península, 2001.
- “La literatura de la «condición obrera» y el lenguaje de la proletarización” en SANZ, Vicent y PIQUERAS, José Antonio (eds.), *En el nombre del oficio. El trabajador especializado: corporativismo, adaptación y protesta*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 71-102.
- DÍEZ MEDRANO, Juan, *La opinión pública española y la integración europea: 1994, resultados del estudio 2084*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995.
- DIMOCK, Wai-chee y GILMORE, Michael T. (eds.), *Rethinking class: literary studies and social formations*, New York, Columbia University Press, 1994.
- DIOS MURO, Juan de, RAYMOND, José Luis L., TOHARIA, Luis y URIEL, Ezequiel, *Análisis de las condiciones de vida y trabajo en España*, Madrid, Secretaria de Estado de Economía, 1988.
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *1906-2006, centenario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social*, Madrid, Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 2007.
- DOERINGER, Peter B. y PIORE, Michael, *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*, Lexington (Mass), D. C. Heath, 1971.
- DOGAN, M. (ed.), *Comparing Pluralist Democracies: Strains on Legitimacy*, Boulder, Westview Press, 1988.

DOLADO, Juan J., [et al.], “The economic Impact of Minimum Wages in Europe”, *Economic Policy*, nº 23, (1996), pp. 319-372.

- FELGUEROSO, Florentino y id., “Explaining youth labor market problems in Spain: Crowding-Out, Institutions, or Technology shifts?”, *Documentos FEDEA*, nº 2000-09, (2000).
- GARCÍA-SERRANO, Carlos F. y JIMENO, Juan F., “Drawing Lessons from the boom of temporary jobs in Spain”, *The Economic Journal*, nº 112, (2002), pp. 270-295.

DOMÈNECH SAMPERE, Xavier, “El problema de la conflictividad bajo el franquismo: saliendo del paradigma”, *Historia Social*, nº 42, (2002), p. 123-144.

- *Pequeños grandes cambios. Movimiento obrero y cambio político en la década de los sesenta*, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2006.
- *Clase obrera, antifranquismo y cambio político. Pequeños grandes cambios, 1956-1969*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008.
- “Tempus fugit” en RISQUES, Manel, VINYES, Ricard y MARÍ, Antoni (dirs.), *En Transición*, Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona / Dirección de Comunicación de la Diputación de Barcelona, 2008.
- “El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo. Revisado” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio, *La clase trabajadora, después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 26/27 (2008), pp. 47-81.
- “Cenizas que ardían todavía: la identidad comunista en el tardofranquismo y la transición” en BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (eds.), *«Nosotros los comunistas». Memoria, identidad e historia social*, Sevilla, Fundación de Investigaciones Marxistas / Atrapasueños, 2009, pp. 93-138.
- “La formación de la clase obrera bajo el franquismo. Nuevos debates”, *Ayer*, nº 79, (2010), pp. 283-296.
- (ed.), *Movimiento vecinal y cambio político*. Dossier monográfico, *Historia del Presente*, nº 16, (2010).
- “Puntos de fuga. La historia del movimiento obrero y el tardofranquismo” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos. Obreros, sindicalistas, trabajadores en el Madrid del final del franquismo*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Ministerio de Presidencia, 2008, pp. 9-40
- *Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977)*, Barcelona, Icaria, 2012.
- “La clase obrera bajo el franquismo. Aproximación a sus elementos”, *Ayer*, nº 85, (2012), pp. 201-225.

DOMINGO SANZ, Mª Victoria de, “El empleo y el paro: comparación de los resultados de la EPA con las fuentes administrativas”, *Economía española y Protección Social*, nº 3, (2011), pp. 37-62.

DOMÍNGUEZ, Justo, “Diez años de relaciones laborales industriales en España” en ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos y patronal en España*, Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 75-105.

DOMÍNGUEZ ARÍAS, Ángel, “Evolución del ordenamiento jurídico-laboral en el franquismo y en la transición política” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos. Obreros, sindicalistas, trabajadores en el Madrid del final del franquismo*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Ministerio de Presidencia, 2008, pp. 184-235.

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M., “Una perspectiva sobre la rémora fiscal inflacionaria en el IRPF”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 86, (1994), pp. 88-96.

- “El ahorro del sector público en España: 1975-1995” en *Papeles de Economía Española*, nº 70, (1997), pp. 100-114.
- CARRASCO CASTILLO, Germán, “La tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España: un análisis de su evolución (1979-1988)”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 135, (1998), pp. 19-26.

- DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M., “Inflación e impuesto sobre la renta: aspectos teóricos y análisis del caso español”, *Revista valenciana de Economía y Hacienda*, nº 11, (2004), pp. 83-112.
- DOMÍNGUEZ RAMA, Ana, *La “guerra popular” en la oposición al franquismo. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P.)*, trabajo de Tercer Ciclo, Universidad Complutense, 2006.
- “Orígenes y conformación del Partido Comunista de España (marxista-leninista)” en BUENO, Manuel (coord.), *Comunicaciones del II Congreso de historia del PCE: de la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque Social*, 2007 [CD-ROM].
- DORADO, Roberto, “Estrategia socialista para la década de los años 90” en GUERRA, Alfonso [et al.], *Nuevos horizontes teóricos para el socialismo: Jávea II* [II Encuentro sobre el futuro del socialismo, 22, 23 y 24 de septiembre de 1986], Madrid, Sistema, 1987, pp. 129-147.
- “La estrategia del Gobierno durante los años ochenta” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del cambio: diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992, pp. 57-83.
- DOSSE, François, *La historia en migajas. De “Annales” a la “nueva historia”*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1988.
- DOWD, Douglas, *Capitalism and its Economics: a Critical History*, London, Pluto Press, 2000.
- DUEÑAS HERRERO, Laurentino Javier, “La viabilidad del sistema de Seguridad Social. Entre la solidaridad y el ahorro: ¿reparto versus capitalización?”, *Aranzadi Social*, nº 2, (1996), pp. 2533-2560.
- DUMÉNIL, Gérard y LÉVY, Dominique, *Capital Resurgent. Roots of the Neoliberal Revolution*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2004.
- DURÁ JUEZ, Pedro, “Principales recomendaciones del Consejo Consultivo de Privatizaciones”, *Información Comercial Española*, nº 772, (1998), pp. 109-124.
- DURÁN, M^a Ángeles, *Desigualdad social y enfermedad*, Madrid, Tecnos, 1983.
- *La jornada interminable*, Barcelona, Icaria, 1986.
- DURÁN LÓPEZ, Francisco, *El trabajo temporal: (la duración del contrato de trabajo)*, Madrid, Instituto de Estudios Sociales, 1980.
- “Sindicatos y crisis económica”, *Civitas: Revista española de derecho del trabajo*, nº 8, (1981), pp. 429-442.
 - “«Lanzamiento de nuevas actividades» y contratación temporal”, *Documentación Laboral*, nº 13, (1984), pp. 29-44.
 - “Sindicatos y salida concertada de la crisis”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), pp. 316-328.
 - *El derecho del trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.
 - “«Lanzamiento de nuevas actividades» y contratación temporal”, *Documentación Laboral*, nº 13, (1985), pp. 29-44.
 - “El Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva”, *Relaciones Laborales*, nº 2, (1990), pp. 121-151.
 - “La negociación colectiva y el sistema de relaciones laborales” en *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 18, (1992), pp. 8-18.
 - *Jurisprudencia constitucional y derecho del trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.
 - SÁEZ LARA, Carmen, *El papel de participación en las nuevas relaciones laborales*, Madrid, Civitas, 1997.
 - (coord.), *El diálogo social y su institucionalización en España e Iberoamérica*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.

- “El futuro del Derecho del Trabajo”, *Civitas. Revista española de derecho del trabajo*, nº 118, (2000), pp. 7-13.
 - (ed.), *Informe sobre riesgos laborales y su prevención: la seguridad y la salud en el trabajo en España. Estudio para la elaboración de un informe sobre riesgos laborales y su prevención*, Madrid, Ministerio de Presidencia / Boletín Oficial del Estado, 2001.
 - GARCÍA BENAVIDES, Fernando, *Informe de salud laboral. Los riesgos laborales y su prevención*, Madrid, Zurich / Atelier, 2004.
 - *Una visión liberal de las relaciones laborales*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2006.
 - TUDELA CAMBRONERO, Gregorio Y VALDEOLIVAS GARCÍA, Yolanda, *Informe sobre la situación de la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción en España*, Madrid, Edisofer, 2008.
- DURÁN, Rafael, *Contención y transgresión. Las movilizaciones sociales y el Estado en las transiciones española y portuguesa*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
- DURÁN HERRERA, Juan José, SALAS FUMÁS, Vicente y SANTILLANA DEL BARRIO, Ignacio, *La formación de capital de la economía española en el contexto de la crisis (estructura impositiva, ahorro e inversión)*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Instituto de Estudios Fiscales, 1985.
- “Veinticinco años de inversión directa española en el exterior, 1978-2003: una senda de crecimiento”, *Economía Industrial*, nº 349-350, (2003), pp. 147-154.
- DÜRR, Ernest [et al.], *Paro, inflación y crecimiento. La experiencia española, 1973-80*, Madrid, Espasa-Calpe, 1980.
- EAGLETON, Terry, *The Illusions of Postmodernism*, Oxford, Wiley / Blackwell, 1996.
- *Ideología. Una introducción*, Barcelona, Paidós, 2005.
 - *Why Marx Was Right*, New Haven, Yale University, 2011
 - *Por qué Marx tenía razón*, Barcelona, Península, 2011.
- EASTERLY, Williams, *The Elusive Quest for Growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics*, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 2002.
- *El busca del crecimiento: andanzas y tribulaciones de los economistas del desarrollo*, Barcelona, Antonio Bosch, 2003.
- ECHEVERRÍA, Javier, *La movilidad social en España (1940-1991)*, Madrid, Istmo, 1999.
- EDWARDS, Paul K., *Conflict at work. A materialist analysis of workplace Relations*, Oxford, Basil Blackwell, 1986.
- *El conflicto en el trabajo. Un análisis materialista de las relaciones laborales en la empresa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990.
- EDWARDS, Richard, REICH, Michael y GORDON, David, *Labour Market Segmentation*, Lexington (Mass), D. C. Heath, 1971.
- y id., “Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation”, *American Economy Review*, vol. LXIII, nº 2, (1973), pp. 359-365.
- EDWARDS, Sebastian, “The International Monetary Fund and the Developing Countries: A Critical Evaluation”, *NBER Working Paper*, nº 2909, (1989).
- EGEA, Carmen, NIETO, Antonio y JIMÉNEZ, Francisco, “El estudio del retorno. Aproximación bibliográfica”, *Migraciones & Exilios*, nº 3 (2002), pp. 141-171.
- EGIDO LEÓN, Mª de los Ángeles y FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana (eds.), *Ciudadanas, militantes, feministas: mujer y compromiso político en el siglo XX*, Madrid, Eneida, 2011.
- EGUREN, Nerea, “Familia y Estado: el reparto del bienestar”, *Abaco*, nº 29-30, (2001), pp. 101-122.
- EISENSTADT, Shmuel N., *From to Generation to Generation. Age groups and social structure*, Illinois, The Free Press, 1966.
- *Ensayos sobre el cambio social y la Modernización*, Madrid, Tecnos, 1970.

- *Modernización. Movimientos de protesta y cambio social*, Buenos Aires, Amorrortu, 1972.
- EKAIZER, Ernesto, “La expropiación del miedo” en JULIÁ, Santos, PRADRERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la transición*, Madrid, Taurus, 1996, pp. 377-383.
- ELEY, Geoff y NIELD, Keith, “Volver a empezar: el presente, lo postmoderno y el momento de la historia social” en *Ficción, verdad, historia*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 50, (2004), pp. 47-58.
- NIELD, Keith, *The future of the class in history: what's left of the social?* Michigan, University of Michigan Press, 2007.
- *Una línea torcida: de la historia cultural a la historia de la sociedad*, Valencia, Universitat de València, 2008.
- *El futuro de la clase en la historia: ¿qué queda de lo social?* Valencia, Publicacions Universitat de València, 2010.
- “El mundo profano e imperfecto de la historiografía” en *De la historia cultural a la historia social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 69, (2011), pp. 119-127.
- ELORDI DENTICI, Alberto, “El sistema de protección por desempleo y perspectivas”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 12, (1994), pp. 121-140.
- (coord.), *Trabajo, temporalidad y empresas de trabajo temporal en España*, Madrid, Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), 2001.
- ELORZA, Antonio, “Las raíces del «fenómeno socialista»” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista a debate*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1986, pp. 59-70.
- ELSTER, Jon, *Una introducción a Karl Marx*, Madrid, Siglo XXI, 1991.
- *Making Sense of Marx*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
- ELZO, Javier, ANDRÉS ORIZO, Francisco, GONZÁLEZ BLASCO, Pedro y IRENE DEL VALLE, Ana, *Jóvenes españoles 94*, Madrid, Fundación Santa María, 1994.
- (coord.), *Los valores en la sociedad vasca: su evolución en los años 1990-1995*, Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996.
- ANDRÉS ORIZO, Francisco, GONZÁLEZ-ANLEO, Juan, GONZÁLEZ BLASCO, Pedro, LAESPADA, M^a Teresa y SALAZAR, Leire, *Jóvenes Españoles 99*, Madrid, SM, 1999.
- ENCISO de YZAGUIRRE, Vicente, *Análisis dinámico, comparativo y estructural del comportamiento del Impuesto sobre el Patrimonio neto en España*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2004.
- ENGELS, Friedrich, *Introducción a la dialéctica de la naturaleza: el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre*, [Madrid], Ayuso [1974] [1875/1876].
- ENTELMAN, Remo, F., *Teoría de conflictos: hacia un nuevo paradigma*, Barcelona, Gedisa, 2002.
- EQUIPO DE ESTUDIO, *La clase obrera, protagonista del cambio*, Madrid, Ediciones Elías Querejeta, 1976.
- EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA (EDIS) [NAVARRO BOTELLA, Francisco José], *Las elecciones generales de 1982: opiniones y actitudes políticas de los españoles*, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, [1983].
- “Desigualdad y pobreza” en *Pobreza y Marginación*. Dossier monográfico, *Documentación Social*, nº 56/57 [extraordinario] (1984), pp. 39-122.
- EQUIPO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, *Los trabajadores ante la concertación social*, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1986.
- EQUIPO DE SOCIOLOGÍA ELECTORAL, “El Referéndum de marzo de 1986 sobre la permanencia de España en la OTAN y sus consecuencias para el sistema político”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 52, (1986), pp. 183-215.
- EQUIPO JAIME VERA, *La alternativa socialista del PSOE*, Madrid, Cuadernos para el dialogo, 1977.

EQUIPO NIZKOR, *La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas*, Madrid, 2004 [www.derechos.org].

ERBES-SEGUIN, Sabine y OLLIER, Pierre, *Sociología del trabajo*, Madrid, Pirámide, 1972.

ERICE, Francisco, “Los condicionamientos del giro táctico del PCE en 1956: El contexto de la Política de Reconciliación Nacional” en BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coords.), *Estrategias de alianza y políticas unitarias en la historia del PCE*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 24, (2006), pp. 129-150.

- “Estrategias, debates y divergencias en el movimiento obrero y sindical en el último franquismo” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir.), *Delincuentes políticos. Obreros, sindicalistas, trabajadores en el Madrid del final del franquismo*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2008, pp. 318-377.

ERICKSON, Charlotte, “Quantitative History”, *The American Historical Review*, vol. LXXX, nº 2, (1975), pp. 351-365.

ESCARIO LATAS, Regina, “Sostenibilidad del déficit público. Un análisis desagregado, 1964-1998”, *Cuadernos Aragoneses de Economía*, vol. XV, nº 1, (2005), pp. 117-136.

ESCOBAR, Modesto R., *La identidad social del parado*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.

ESCOBEDO LÓPEZ, Mª Isabel y MAULEÓN, Ignacio, “Demanda de dinero y economía sumergida”, *Hacienda Pública Española*, nº 119, (1991), pp. 105-122.

- *La financiación de la Seguridad Social y sus efectos finales sobre el empleo: evidencia empírica en España, 1975-1983*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

ESCOT MANGAS, Lorenzo y GALINDO MARTÍN, Miguel Ángel, “Evidencia empírica de la convergencia real”, *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 3, (2000).

ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco, *El impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas*, Madrid, Civitas, 1981.

ESCUADERO, Manuel, “Objetivos futuros para una política económica progresista” en *Estado de bienestar y opciones de política económica*. Dossier monográfico, *Sistema*, nº 80-81, (1987), pp. 111-120.

- “La pluralidad de sensibilidades en el PSOE”, *Sistema*, nº 102, (1991), pp. 19-30.

ESCUADERO, Ricardo (coords.), *La negociación colectiva en España: una visión cualitativa*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004.

ESTEBAN, Jorge de, *El Estado de la Constitución: diez años de gobierno del PSOE*, Madrid, Libertarias / Produfi, 1992.

ELOLA, Javier y NAVARRO, Vicenç, “Análisis de las políticas sanitarias españolas, 1975-1992”, *Sistema*, nº 126, (1995), pp. 19-39.

ESPADAS ALCÁZAR, Mª Ángeles, “Las relaciones Estado-Ciudadanos en la reestructuración del Bienestar: revisión conceptual para un análisis crítico de la Política Social”, *Cuadernos de Trabajo Social*, nº 20, (2007), pp. 167-188.

ESPAI en BLANCH (coord.), *Luchas autónomas en los años setenta: del antagonismo al malestar social*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008.

ESPÍN ARBANAT, Mª Victoria y DÍAZ RODRÍGUEZ, Juan Antonio, “Paro registrado en las Oficinas de Empleo” *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 35-39.

ESPINA, Álvaro, “La contribución de los salarios al ajuste de la economía española (1977-1982), *Información Comercial Española*, nº 607, (1984), pp. 29-40.

- “El reto de la integración laboral de la generación del «Baby Boom»”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 1-2, (1988), pp. 179-192
- “Política de rentas en España: 1977-1986”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), pp. 343-161.

- “La política activa de recursos humanos: formación del empleo, formación profesional y protección del desempleo (la experiencia española)”, *Cuadernos Laborales de América y España*, (1990) [Buenos Aires, Embajada de España, Consejería Laboral, 1990].
- “Política de rentas: El papel del Gobierno en el proceso de negociación colectiva en España”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 115-124.
- *Empleo, democracia y relaciones industriales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
- “Los sindicatos y la democracia española: la huelga general de diciembre de 1988 y sus implicaciones políticas” en ESPINA, Álvaro, (comp.), *Concertación social, neocorporativismo y democracia*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, pp. 191-226.
- (comp.), *Concertación social, neocorporativismo y democracia*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
- “Diez años de política industrial”, *Leviatán*, nº 50, (1992), pp. 39-64.
- “Diez años en la vida de España. Las políticas laborales y de empleo” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del cambio: diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992, pp. 437-485.
- “Una evaluación dinámica de la negociación colectiva en España (1976-1994): del intercambio político a la cooperación”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25/26, (1994), pp. 269-294.
- *Hacia una estrategia española de competitividad*, Madrid, Fundación Argentería / Visor, 1995.
- “Estrategias de creación de empleo y competitividad: salarios, contratación laboral y políticas activas en España (1976-1994)”, *Hacienda Pública Española*, nº 132, (1995), pp. 7-34.
- “El impacto de la negociación colectiva sobre los salarios, los costes y la competitividad: un análisis gráfico”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 124-125, (1997), pp. 52-81.
- “Política de rentas en España” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999 [1991], pp. 331-357
- *Modernización y estado de bienestar en España*, Madrid, Fundación Carolina / Siglo XXI, 2007.

ESPING-ANDERSEN, Gøsta, *Politics against markets: the social democratic road to power*, Princeton / New Jersey, Princeton University Press, 1985.

- *Los tres mundos del estado de bienestar*, València, Edicions Alfons El Magnànim, 1993.
- REGINI, Marino, *Why Deregulate Labour Markets?* Oxford, Oxford University Press, 2000.
- *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*, Madrid, Ariel, 2004.

ESPINOSA, Francisco, “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Generaciones y memoria de la represión franquista*. Dossier monográfico, *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, nº 6/7, (2006/2007).

- *La columna de la muerte: el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz*, Barcelona, Crítica, 2003.
- *Informe de la represión franquista. Un estado de la cuestión*, septiembre de 2008 [www.todoslosnombres.org].
- (ed.), *Violencia roja y azul: España, 1936-1950*, Barcelona, Crítica, 2010.

ESPUNY TOMÁS, Mª Jesús y PAZ TORRES, Olga (coords. / eds.), *El Proyecto de Ley de Acción Sindical en la Empresa de 1978*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2005.

- PAZ TORRES, Olga (coords.), *La inspección de trabajo, 1906-2006*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008.

ESTAPÉ, Fabián, *Sin acuse de recibo*, edición de sus memorias a cargo de Mónica TERRIBAS i SALA, Barcelona, Plaza y Janés, 2000.

ESTAVILLO DORADO, Julio, MONTES GAN, Vicente José y CARRASCO PRADAS, Amparo, “El proceso de localización de la actividad industrial en España: La experiencia de las ZUR”, *Economía Industrial*, nº 309, (1996), pp. 19-26.

ESTEBAN, Joan M y VIVES, Xavier (dirs.), *Crecimiento y Convergencia en España y en Europa*, II vols., Barcelona, Instituto de Análisis Económico / Fundación de Economía Analítica, 1994.

ESTEBAN MARINA, Ángel, *Contabilidad y base imponible en el nuevo Impuesto sobre Sociedades*, Madrid, Marcial Pons, 1997.

ESTEBAN ROMERO, Alberto, “Previsiones de la demanda turística”, *Información Comercial Española*, nº 749, (1996), pp. 89-97.

ESTEFANÍA, Joaquín, *La Trilateral Internacional del capitalismo: el poder de la trilateral en España*, Madrid, Akal, 1979.

- “Cambios en la clase empresarial”, *Economistas*, vol. IV, nº 26, (1986), pp. 139-141.
- SERRANO, Rodolfo, “Diez años de relaciones industriales en España” en ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos y patronal en España*, Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 17-42.
- *La larga marcha. Medio siglo de política (económica) entre la historia y la memoria*, Barcelona, Península, 2007.

ESTEVE MORA, Fernando, “Crecimiento y bienestar. La economía que no está en el PIB” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política económica*, Madrid, Editorial Popular, 1990, pp. 237-271.

- MUÑOZ BUSTILLO, Rafael, “Margen y distribución funcional de la renta: algunas relaciones teóricas y su aplicación para el caso español”, *Hacienda Pública Española*, nº 116, (1990), pp. 145-154.
- [et al.], *Modernización económica y desigualdad social*, Madrid, Caritas, 1992
- MUÑOZ de BUSTILLO LLORENTE, Rafael, “La política económica en los años 80 y perspectivas de futuro”, *Documentación Social*, nº 88, (1992), pp. 9-24.
- “«Atracción fatal». Una contribución al debate sobre la integración de la economía española en la Unidad Económica y Monetaria Europea” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los ochenta*, Madrid / Barcelona, Icaria / Instituto Sindical de Estudios, 1993, pp. 83-132.

ESTEVILL, Jordi y DE LA HOZ, José M^a, “Transición y crisis: la complejidad de las relaciones laborales en España” en BAGLIONI, Guido y CROUCH, Colin (comps.), *Las relaciones laborales en Europa. El desafío de la flexibilidad*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, pp. 321-351.

ESTRADA GARCÍA, Ángel, SASTRE de MIGUEL, M^a Teresa y VEGA CROISSIER, Juan Luis, “El mecanismo de transmisión de los tipos de interés: el caso español”, *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 9408, (1994).

- PONS, Alex y VALLÉS, Javier, “La productividad de la economía española: una perspectiva internacional”, *Información Comercial Española*, nº 829, (2006), pp. 7-25.

ESTRAMIANA, José Luis, GARRIDO LUQUE, Alicia y TORREGROSA, José Ramón (coords.), *Psicología social aplicada*, Madrid, McGraw-Hill, Intermaerica, 1996.

ESTRUCH MAJÓN, Alejandro, *Desigualdad y política redistributiva: una estimación de la incidencia de los gastos sociales en España a partir de la EPF (1990-91)*, Barcelona, Cedecs Economía, 1996.

ESTUDIOS SOBRE CONSUMO, “Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica”, *Estudios sobre el Consumo*, nº 6, (1985), pp. 165-172.

ETXEZARRETA, Miren, *La economía española (1970-1979). Un informe crítico para descifrar una década de apogeo y crisis de la economía española. Fulgor y miseria del capital nacional* (con la colaboración de Monserrat GRASSOT y por encargo de la CNT), Barcelona, El Viejo Topo, 1979.

- (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991.
- “Economía Política del Proceso de Acumulación” en id. (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 31-92.
- *Crítica a la economía ortodoxa. Notas de trabajo para la formación en economía crítica*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona / Seminari d'Economia Crítica TAIFA, 2004.
- “Una aproximación crítica de la economía de la Unión Europea”, *Revista de Economía Crítica*, nº 3, (2005), pp. 97-127.
- (coord.), “Del pleno empleo a la plena precariedad”, *Seminari d'Economia Crítica TAIFA*, nº 3, (2006).

EUROPEAN COMMISSION / EUROSTAT, *Information society statistics: pocketbook*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2001.

- *Measuring progress towards a more sustainable Europe: proposed indicators for sustainable development: data 1980-99*, Luxembourg, Office for Official, 2001.
- *Enterprises in Europe: data 1987-97: sixth report*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2001.

EUROPEAN COMMISSION / EUROSTAT, *Living conditions in Europe: statistical pocketbook: data 1998-2002*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2003.

EUROSTAT, *Poverty in figures: Europe in the Early 1980*, Luxembourg, Statistical Office of European Communities, 1990.

- *Social Protection Expenditure and Receipts, 1980-1993*, Luxembourg, Eurostat, 1993.
- *Work and health in the EU. A statistical portrait. Data 1994-2002*, Luxembourg, Eurostat / Comisión Europea, 2003.

EZQUERRA ESCUDERO, Luis, *Tiempo de trabajo en España: aproximación histórica. Desde la emergencia del derecho social hasta el Estatuto de los Trabajadores de 1980*, Barcelona, Atelier, 2006.

EZQUIAGA, Ignacio, *El mercado español de deuda del Estado: estructura y formación de precios*, Barcelona, Ariel, 1991.

FANJUL, Óscar, MARAVALL, Fernando y ARANZADI, José Claudio, “Una nota sobre el ajuste y reindustrialización”, *Papeles de Economía Española*, nº 15, (1983), pp. 317-325.

- “El proceso configurador del INH”, *Economía Industrial*, nº 248, (1986), pp. 37-40.

FARIÑAS, José Carlos, “La empresa española: características generales y comportamientos” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 409-430.

FARRÀS, Andreu y CULLELL, Pere, *El 23-F a Catalunya*, Barcelona, ONCE / CPB, 1998.

FEBO, Giuliana di, “Resistencias femeninas al franquismo. Para un estado de la cuestión”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 28, (2006), pp. 153-168.

FEBVRE, Lucien, *Combats pour l'histoire*, Paris, Armand Colin, 1965.

- *Combates por la historia*, 3ª ed., Barcelona, Ariel, 1974.

FEDEA, *25 Años de economía española. Testigos*, Madrid, FEDEA, 2011.

FEIGE, Edgar L., “How big is the irregular economy?”, *Challenge*, nº 22, (1979), pp. 5-13.

- (ed.), *The underground economies. Tax evasion and information distortion*, Cambridge, University of Cambridge, 1989.

FEITO ALONSO, Rafael, *Estructura social contemporánea: las clases sociales en los países industrializados*, 2ª ed., Madrid, Siglo XXI, 1997 [1995].

FEITO HIGUERUELA, José Luis, “Las políticas de ajuste del FMI”, *Papeles de Economía Española*, nº 17, (1983), pp. 54-69.

- “Competencia, mercado y equidad: un debate”, *Revista de Economía*, nº 9, (1991), pp. 7-17.

- “Competitividad, productividad y déficit exterior”, *Economistas*, vol. XXV, nº 11, (2007), pp. 6-11.
- FEIXA, Carles, *Joventut com a metàfora. Sobre les cultures juvenils*, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993.
- *De jóvenes, bandas y tribus: antropología de la juventud*, Barcelona, Ariel, 1998.
- “Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea”, *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, vol. IV, nº 2, (2006).
- FELDSTEIN, Martin (ed.), *American economic policy in the 1980s*, Chicago, The University of Chicago, 1994.
- FELIPE, Jesús de, *Orígenes y formación del movimiento obrero en España. Una revisión histórica e historiográfica*, Tesis Doctoral, Universidad La Laguna, 2009.
- FEO, Julio, *Aquellos años*, Barcelona, Ediciones B, 1993. Y más recientemente, id., *Déjame que te cuente*, Madrid, Espejo de Tinta, 2008.
- FERGUSON, Niall, MAIER, Charles S., MANELA, Erez y SARGENT, Daniel J. (eds.), *The shock of the global. The 1970's in perspective*, Cambridge, Harvard University Press, 2010.
- FERNÁNDEZ, Julio, *Enrique Múgica*, Madrid, Grupo 88, 1992.
- FERNÁNDEZ, Vicente Javier, “Economía y política de la peseta, 1974-1984”, *Información Comercial Española*, nº 617-618, (1985), pp. 81-100.
- “Liberalización económica, credibilidad y entrada en el Sistema Monetario Europeo”, *Información Comercial Española*, nº 657, (1988), pp. 127-136.
- FERNÁNDEZ, Zulima, “El alcance del proceso privatizador en España”, *Papeles de Economía Española*, nº 38, (1998), pp. 243-246.
- FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio, “Lógica de mercado y trabajo”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (2003), pp. 235-256.
- FERNÁNDEZ BLANCO, Matilde, “Las políticas sociales en la década de los ochenta. Importancia y vigencia de las políticas de bienestar social” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del cambio: diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992, pp. 229-273.
- FERNÁNDEZ-BRASO, Miguel, *Conversaciones con Alfonso Guerra*, Barcelona, Planeta, 1983.
- FERNÁNDEZ BUEY, Francisco, *Leyendo a Gramsci*, Barcelona, El Viejo Topo, 2001.
- *Utopías e ilusiones naturales*, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo, 2007.
- FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, “De los Pactos de la Moncloa a la Constitución (julio 1977-1978)” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *Economía española de la transición y la democracia, 1977-1986*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1990, pp. 23-34.
- “Mariano Rubio Navarro, artífice de los planes de estabilización” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en sus ministros. Franquismo y democracia*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, pp. 53-90.
- “Élites y poderes económicos en la España del siglo XX” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de Lara, diez años después. La huella de un legado*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 30 (2008), pp. 57-82.
- FERNÁNDEZ CORNEJO, José Andrés y ALGARRA PAREDES, Ángel, *El mercado de trabajo en la Unión Europea. Fundamentos teóricos y políticas de empleo*, Madrid, Pirámide, 2000.
- FERNÁNDEZ de CASTRO, Joaquín, “Una aproximación sociológica a la reconversión industrial”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), pp. 403-424.
- FERNÁNDEZ de PINEDO, Emiliano, “La historia económica, ¿un filón que se agota?” en SÁNCHEZ NISTAL, José M^a [et al.], *Problemas actuales de la historia. Terceras Jornadas de Estudios Históricos*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, pp. 68-82.

FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón, *La explosión del desorden: la metrópoli como espacio de la crisis global*, Madrid, Fundamentos, 1993.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Aladino, “La reconversión industrial en España: impacto regional y transformaciones espaciales”, *Ería: Revista cuatrimestral de Geografía*, nº 17, (1988), pp. 191-200.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás (coord.), *Estado de bienestar: perspectivas y límites*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1998.

- GARCÉS FERRER, Jorge (coords.), *Crítica y futuro del Estado del Bienestar: reflexiones desde la izquierda*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999.

FERNÁNDEZ GRUTOS, Rafael (dir.), *La negociación colectiva y las estadísticas salariales*, Madrid, Ministerio de Trabajo / Instituto de Estudios Sociales, 1980.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, M^a. Fernanda, “La exclusión de los trabajadores temporales del ámbito de los convenios colectivos”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1988), pp. 389-407.

FERNÁNDEZ LOMMEN, Yolanda y ECHENAGUSIA, Javier, “Miguel Boyer”, *Economistas*, nº 72, (1996), pp. 74-80.

FERNÁNDEZ MACÍAS, Enrique, “Job instability and political attitudes towards work: some lessons from the Spanish case”, *European Journal of Industrial Relations*, vol. XIX, nº 2, (2003) pp. 205-222.

FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco, “La reforma fiscal y la consolidación de la democracia” en PSOE. EQUIPO JAIME VERA, *La alternativa socialista del PSOE (algunas contribuciones)*, Madrid, Cuadernos para el dialogo, 1977, pp. 371-392.

- “Las políticas europeas de concertación social y democracia industrial”, *Sistema*, nº 91, (1989), pp. 17-28.
- “La construcción de una sociedad del bienestar en el contexto de la economía española”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 51-66.
- “El déficit público: ¿Problema o instrumento?”, *Leviatán*, nº 45, (1991), pp. 5-16.
- “La década de los ochenta: impulso y reforma económica” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del cambio: diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992, pp. 135-194.
- El pacto social y las relaciones laborales en España”, *Leviatán*, nº 51-52, (1993), pp. 5-14.
- “El PSOE y el retorno de los viejos problemas”, *Sistema*, nº 135, (1996), pp. 5-28.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pascual, “Los fondos estructurales europeos y el desarrollo regional: balance de una década desde la perspectiva española”, *Información Comercial Española*, nº 766, (1997), pp. 135-145,

FERNÁNDEZ MELLIZO-SOTO, M^a., “¿Para qué sirven las campañas electorales? Los efectos de la campaña electoral española de 1993”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 148, (2000).

FERNÁNDEZ MORENO, Marta, “El gasto en protección en los países de la Unión Europea durante el periodo 1980-1991”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 21-22, (1993), pp. 192-202.

FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato y MATÍAS, Gustavo, “Modelo Económico de la Unión Europea: fundamentos y limitaciones”, *Información Comercial Española*, nº 820, (2005), pp. 3-10.

- “Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura socialista, 1982-1986. Dossier monográfico Historia del Presente*, nº 8, (2006), pp. 39-60.

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Francisco, *Palabras en libertad [conversaciones con Eduardo G. Rico]*, Barcelona, Argos de Vergara, 1982

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Miguel Ángel, “La democracia necesita empresarios”, *Leviatán*, nº 7, (1982), pp. 53-58.

- “La política económica del Gobierno socialista”, *Leviatán*, nº 23-24, (1986), pp. 41-51.

- “Sobre la política económica, los sindicatos y la incorporación de la mujer al trabajo”, *Sistema*, nº 80-81, (1987), pp. 145-156.
- “La liberalización de los servicios en España” en *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, nº 3, (1994), pp. 327-382.
- “Privatización, desregulación y liberalización de los mercados” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 661-682.

FERNÁNDEZ ORRICO, Javier, “La modalidad asistencial básica de Seguridad Social desarrollada en España: las pensiones no contributivas”, *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, nº 34, (2002), pp. 97-128.

FERNÁNDEZ PÉREZ, Eduardo, “Tipos de interés real en España y en los siete países más industrializados”, *Papeles de Economía Española*, nº 24, (1985), pp. 313-317.

- “Evolución reciente de los tipos de interés en España y en la Comunidad Europea”, *Papeles de Economía Española*, nº 52-53, (1992), pp. 286-303.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Zulima, “El papel actual de la empresa pública: consideraciones previas a la privatización”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 101-102, (1995), pp. 9-25.

FERNÁNDEZ SANZ, Juan José (coord.), *Prensa especializada actual: doce calas*, Madrid, McGraw Hill, 2008.

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y id. (eds.), *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Madrid, Alianza, 2002, pp. 156-161.

FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka, “Agur a las armas. EIA, Euskadiko Ezkerra y la disolución de ETA político-militar (1976-1985)”, *Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación vasca*, nº 33, (2010), pp. 55-96.

FERNÁNDEZ STEINKO, Armando y LACALLE, Daniel (eds.), *Sobre la democracia económica. La democracia económica en la sociedad*, III vols., Madrid, El Viejo Topo / Fundación de Investigaciones Marxistas, 2001, vol. I.

FERNÁNDEZ SUÁREZ, Sergio, *25 años UGT-Euskadi. Historia social y del movimiento obrero*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2003

FERNÁNDEZ VIAGAS, Plácido, *La Constitución de la Monarquía Parlamentaria*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

FERRERA, Maurizio, “The «Southern Model» of Welfare in Social Europe”, *Journal of European Social Policy*, vol. VI, nº 1, (1996), pp. 17-37.

FERRAZ LORENZO, Manuel, “La historia postmoderna (o postsocial) y sus influencias en la historiografía de la educación” en id. (coord.), *Repensar la historia de la educación: Nuevos desafíos, nuevas propuestas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 167-190.

FERRER, Pere, *Juan March: los inicios de un imperio financiero*, Palma, Cort, 2001

- *Joan March: la cara oculta del poder (1931-1945)*, Palma, Cort, 2004.

FERRER CASTELLÓ, Evaristo, *Cómo leer la prensa económica: indicadores macroeconómicos y mercados financieros*, Alicante / San Vicente [del Raspeig], Fundesem Business School / Alicante: Club Universitario, 2010.

FERRI, Llibert, MUIXÍ, Jordi y SANJUÁN, Eduardo, *Las huelgas contra Franco (1939-1956). Aproximación a una historia del movimiento obrero español de posguerra*, Barcelona, Planeta, 1978;

FERREYRA, Leandro, LOGIUDICE, Edgardo y THWAITES, Mabel (eds.), *Gramsci mirando al sur. Sobre la hegemonía en los 90*, Buenos Aires, K&ai Editor, 1994.

FIERRO ARIAS, José Daniel, *La transición de la adolescencia a la edad adulta: teorías y realidades*, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2009.

FIGUEROLA PALOMO, Manuel, *Teoría económica del turismo*, Madrid, Alianza, 1985.

- “Incidencia y efectos multiplicadores del turismo en la economía española”, *Información Comercial Española*, nº 749, (1996), pp. 17-31.

FINA, Lluís, “Salarios y política de salarios. Unas notas sobre la experiencia española”, *Cuadernos de Economía*, vol. IX, nº 25, (1981), pp. 481-488.

- ESPINA, Álvaro (coords.) *Oferta y demanda de trabajo*, vol. I, dentro TOHARIA, Luis BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, III vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.
- y id. (comps.), *Salarios y política de rentas*, vol. II, dentro TOHARIA, Luis BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, III vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.
- “Evolución de las prestaciones en España y en la OCDE”, *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 328-332.
- TOHARIA, Luis, *Las causas del paro en España. Un punto de vista estructural*, Madrid, Fundación IESA, 1987.
- “El paro en España: sus causas y la respuesta de la política económica” en id. y TOHARÍA, Luis, *Las causas del paro en España. Un punto de vista estructural*, Madrid, Fundación IESA, 1987, pp. 15-68.
- *Mercado de Trabajo y políticas de empleo*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2001.
- GONZÁLEZ DE LENA, Francisco y PÉREZ INFANTE, José Ignacio, *Negociación colectiva y salarios en España*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2001.
- TOHARÍA, Luis (coords.), *El empleo en España: situación y perspectivas*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001.

FINE, Ben, *Labour Market Theory. A Constructive Reassessment*, London / New York, Routledge, 1998.

FIORAVANTI, Eduardo, *El concepto de modo de producción*, Barcelona, Península, 1974.

FISCHER, Ernst, *Problemas de la generación joven*, Madrid, Ayuso, 1975.

FISHMAN, Robert M., *Working-Class Organization and the Return to Democracy in Spain*, Ithaca, Cornell University Press, 1990.

- *Organización obrera y retorno a la democracia en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1996.
- *Voces de la democracia*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008.

FITA ORTEGA, Fernando, *Limites legales a la jornada de trabajo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999.

FLANAGAN, Robert J., SOSKICE, David W. y ULMAN, Lloyd, *Sindicalismo, estabilización económica y política de rentas: la experiencia europea*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.

FLAQUER, Lluís, “La articulación entre familia y el Estado de bienestar en los países de la Europa del Sur”, *Papers*, nº 73, (2004), pp. 27-58.

FLEMING, Matthew H., ROMAN, John y FARRELL, Graham, “The Shadow Economy”, *Journal of International Affairs*, vol. LIII, nº 2, (2000), pp. 387-409.

FLORENCIO, Rafael, *Sociedad y política en el siglo XX. Viejos y nuevos movimientos sociales*, Madrid, Síntesis, 1993.

FLÓREZ SABORIDO, Ignacio, *La contratación temporal como medida de fomento del empleo en España: la creciente flexibilidad en el acceso al empleo*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1994.

FLORIDO DEL CORRAL, David, GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis y ROCA MARTÍNEZ, Beltrán, *El pueblo en la calle: reconversión naval, sindicalismo y protesta popular en el astillero de Puerto Real*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009.

FLOUD, Roderick, , *An introduction to quantitative methods for historians*, London, Methuen, 1973.

- *Métodos cuantitativos para historiadores*, Madrid, Alianza, 1975.

FOGEL, Robert W., *Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History*, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1964.

- *Los ferrocarriles y el crecimiento económica de Estados Unidos. Ensayos de historia econométrica*, Madrid, Tecnos, 1974.
 - y ENGERMAN, Stanley L., *Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery*, New York, W.W. Norton and Company, 1974.
 - *Tiempos en la cruz. La economía esclavista en los Estados Unidos*, Madrid, Siglo XXI, 1981.
- FOLGADO BLANCO, José, “Coste laboral, y competitividad y empleo de la economía española”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25-26, (1994), pp. 235-242.
- FOLGUERA, Pilar, “La construcción de lo cotidiano durante los primeros años del franquismo”, *Ayer*, nº 19, (1995), pp. 165-188.
- (coord.), *El feminismo en España: dos siglos de historia*, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2007.
- FONT, José, “La abstención electoral en España: certezas e interrogantes”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 71-72, (1995), pp. 11-40.
- FONTANA, Josep, *La quiebra de la Monarquía Absoluta*, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 1974.
- *Historia: análisis del pasado y proyecto social*, Barcelona, Crítica, 1982
 - *La crisis del antiguo régimen, 1808-1833*, Barcelona, Crítica, 1979.
 - (ed.), *España bajo el franquismo*, Valencia, Crítica / Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, 1986.
 - *La historia después del fin de la historia: reflexiones acerca de la situación actual de la ciencia histórica*, Barcelona, Crítica, 1992.
 - “La importancia de E. P. Thompson”, *Mientras Tanto*, nº 58, (1994), pp. 81-86.
 - *La historia de los hombres*, Barcelona, Crítica, 2001.
 - *Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945*, Barcelona, Pasado & Presente, 2011.
- FONTANEDA GOMÉZ, Ignacio y MANZANEDO del CAMPO, Miguel Ángel, *Las condiciones de trabajo en España tras la aprobación de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales y su evolución*, Burgos, Universidad de Burgos, 2005.
- FORCADELL, Carlos, “Sobre desiertos y secanos: Los movimientos sociales en la historiografía española”, *Historia contemporánea*, n. 7, (1992), pp. 101-116.
- “Sindicalismo y movimiento obrero: La recuperación historiográfica de las clases trabajadoras” en ORTIZ HERAS, Manuel, RUIZ, David y SÁNCHEZ, Isidro (coords.), *Movimientos sociales y estado en la España contemporánea*, Cuenca, Universidad Castilla-La Mancha, 2001, pp. 243-264.
 - (ed.), *Usos de la historia y políticas de memoria [6º, 2002, Zaragoza]*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.
 - FORCADELL, Carlos (ed.), *A los 125 años de la fundación del PSOE. Las primeras políticas y organizaciones socialistas*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 54, (2004), pp. 255-287.
 - “La historia social, de la «clase» a la «identidad»” en HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y LANGA, Alicia (eds.), *Sobre la historia actual. Entre política y cultura*, Madrid, Abada, 2005, pp. 16-35.
- FORMINASSO, Ronald P., “The concept of political culture”, *Journal of Interdisciplinary History*, vol. XXXI, nº 3, (2000), pp. 398-403.
- FORNER MUÑOZ, Salvador (ed.), *La Construcción de Europa: de las “guerras civiles” a la “unificación”*, Madrid / Alicante, Biblioteca Nueva / Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2007.
- FOUCE FERNÁNDEZ, José Guillermo, *Juventud y participación sociopolítica en la década de los 90*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2002.

- POWERAKER, Joe, *La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España*, Madrid, Arias Montano, 1990.
- FRAILE, Marta, *Cuando la economía entra en las urnas: el voto económico en España (1979-2006)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2005.
- FRANCIA VIÑA, José M^a, *Veinticinco años de reforma sanitarias: de la transición al gobierno del Partido Popular (1970-1995)*, Salamanca, Hespérides, 1997.
- FRANCO, Nuria, RAMOS, Ester y RODRÍGUEZ, Jesús, *Guía General del Archivo y la Biblioteca de la Fundación Francisco Largo Caballero*, 3^a ed., Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2004.
- FRANCISCO, Andrés de, *Sociología y cambio social*, Barcelona, Ariel, 1997.
- “A modo de prólogo: de la centralidad del trabajo a la teoría de la Historia en Marx” en HERRERO VÁZQUEZ, Francisco, *Hacia una reconstrucción del materialismo histórico*, Madrid, Istmo, 2005.
- FRAGA, Manuel, *Memoria breve de una vida pública*, Barcelona, Planeta, 1993.
- *El cañón giratorio. Conservaciones con Eduardo Chamarro*, Barcelona, Argos Vergara, 1982.
- FREIRE, Espido, *Mileuristas. Retrato de la generación de los mil euros*, Barcelona, Ariel, 2006.
- FREIXAS, Xavier y INURRIETA, Alejandro, “Comportamiento de la cotización en las nuevas salidas a Bolsa”, *Perspectivas del Sistema Financiero*, n° 42, (1993), pp. 97-105.
- FRIEDEN, Jeffry A., *Capitalismo global: el trasfondo económico de la historia del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 2006.
- FRIEDMAN, Milton, *Capitalism and Freedom*, Chicago, University of Chicago Press, 1962.
- *Inflation: Causes and Consequences*, New York, Asia Publishing House, 1963.
 - *Capitalismo y libertad*, Madrid, Rialp, 1966.
 - “The Role of Monetary Policy”, *American Economic Review*, n° 58, (1968), pp. 1-17.
 - FRIEDMAN, Rose D., *Tyranny of the Status Quo*, San Diego, Harcourt Brave Jovanovich, 1984.
 - y id., *Two Lucky People: Memoirs*, Chicago, University of Chicago Press, 1998.
- FRISCH, Helmut, *Theories of Inflation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
- FÜHER, Ilse Marie, *Los sindicatos en España: de la lucha de clases a estrategias de cooperación*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996.
- FUENTE, Ángel de la, “El impacto de los fondos estructurales: convergencia real y cohesión interna”, *Hacienda Pública Española*, n° 165, (2003), pp. 129-148.
- FUENTE, Emilio de la, “Las etapas de la política económica del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista a debate*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1986, pp. 81-92.
- FUENTE, Ismael, *El caballero cansado: el largo adiós de Felipe González*, Madrid, Temas de Hoy, 1991.
- FUENTE LAVIN, Mikel de la, *El régimen jurídico de las horas extraordinarias*, Granada, Comares, 2002.
- FUENTES, Juan Francisco “Clase” en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y id. (eds.), *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Madrid, Alianza, 2002, pp. 156-161.
- “Clase obrera” en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y id. (eds.), *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Madrid, Alianza, 2002, pp. 167-170.
 - FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, “A manera de introducción. Historia, lenguaje y política”, *Ayer*, n° 53, (2004), pp. 11-26.
- FUENTES BARDAJÍ, Joaquín (dir.), *Manual de delitos contra la Hacienda Pública*, Navarra, Thomson Aranzadi, 2008.

FUENTES NAVARRO, M^a Candelaria, CONTRERAS BECERRA, Javier y LÓPEZ CHAVES, Pablo (eds.), *II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea* [2º, 2009, Granada], Granada, Editorial Universidad de Granada, 2010 [CD-ROM].

FUENTES PASCUAL, Ramón, *Los tipos de interés en la economía española: factores determinantes y evidencia empírica*, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1994.

FUENTE PASCUAL, Félix de, *Glosario jurídico-político de la Unión Europea*, Madrid, Tecnos, 2002.

FUENTES QUINTANA, Enrique, “La prioridad política de la economía en la transición española”, *Pensamiento Iberoamericano*, nº 3, (1983), pp. 118-127.

- REQUEIJO, Jaime, “La larga marcha hacia una política económica inevitable”, *Papeles de Economía Española*, nº 21, (1984), pp. 2-39.
- “La estrategia presupuestaria económica española: entre el drama del déficit público y el deterioro de los servicios públicos”, *Papeles de Economía Española*, nº 37, (1987), pp. 508-530.
- *Las reformas tributarias en España: teoría, historia y propuestas*, Barcelona, Crítica, 1990.
- *Hacienda Pública: principios y estructura de la imposición*, Madrid, Ed. Rufino, 1990.
- “De los Pactos de la Moncloa a la Constitución (julio 1977-1978)” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *Economía española de la transición y la democracia, 1977-1986*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1990, pp. 23-34.
- ALCAIDE INCHAUSTI, Julio, *De peores hemos salido: una aproximación a nuestra historia más reciente*, Madrid, Mercado, 1993.
- *El modelo de economía abierta y el modelo castizo en el desarrollo económico de la España de los noventa*, Zaragoza, Publicaciones Universitarias de Zaragoza, 1995
- [et al.], *La Hacienda en sus ministros. Franquismo y democracia*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997.
- “La economía española desde la transición hasta el presente” en ANES, Gonzalo (ed.), *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1999, pp. 717-750.
- “La economía como profesión: Una memoria personal” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 731-755.
- (coord.), *Economía y economistas españoles*, IX vol., Barcelona, Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 1999, vol. VII, *La consolidación académica de la economía*, y, VIII, *La economía como profesión*.
- “El conflicto entre democracia y crisis económica: la respuesta de los Pactos de la Moncloa” en CALVO-SOTELO, Leopoldo [et al.], *Cinco lustros apenas. 25 años de economía y sociedad españolas*, Madrid / Barcelona, Marcial Pons, 2005, pp. 23-57.

FUNDACIÓ PERE ARDIACA, *Maastricht y el futuro de Europa*, Barcelona, Serbal, 1997.

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista a debate*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1986.

FUNDACIÓN 1º DE MAYO, *2010 Anuario*, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2011.

- *Las reformas laborales en España y su repercusión en materia de contratación y empleo. Cincuenta y dos reformas laborales desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980*, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2012.

FUNDACIÓN FOESSA [LINZ, Juan José (dir.)], *Informe sociológico sobre el cambio político en España 1975/1981: IV informe FOESSA*, Madrid, Euramérica, 1981, vol. I

- [MURILLO FERROL, Francisco (dir.)], *Informe sociológico sobre el cambio social en España 1975/1983: IV informe FOESSA*, Madrid, Euramérica, 1981, vol. II.
- [JUÁREZ, Miguel (dir.)], *V Informe sociológico sobre la situación social en España. Sociedad para todos en el año 2000*, II vols., Madrid, Fundación Foessa, 1994.

FUNDACIÓN FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, *Disparidades económicas regionales*, Madrid, Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social / Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1996.

FUNDACIÓN JAIME VERA, *Compromiso de progreso*, Madrid, Fundación Jaime Vera, 1993.

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS, *Cien años de socialismo en España: bibliografía*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1979.

- *Catálogo de publicaciones periódicas*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1984.

FUNES, M^a Jesús, *Cultura, política y sociedad*, vol. IV, dentro de, *Informe 2008: Juventud en España. Jóvenes en una sociedad cambiante: demografía y transiciones a la vida adulta*, V vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 2009.

- (ed.), *A propósito de Tilly. Conflicto, poder y acción colectiva*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2012.

FURET, François, "L'histoire quantitative et la construction du fait historique", *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, vol. XXVI, n° 1, (1971), pp. 63-75.

FURSTENBERG, George M. von, *International money and credit: the policy roles*, Washington, International Monetary Fund, 1983.

FUSI, Juan Pablo, "Algunas publicaciones recientes sobre la historia del movimiento obrero español", *Revista de Occidente*, n° 123, (1973), pp. 358-368.

- PALAFOX, Jordi, *España 1808-1996. El desafío de la modernidad*, Madrid, Espasa Calpe, 1997.

GABRIEL, Juan, *Pinochet's Economist. The Chicago School in Chile*, New York, Cambridge University Press, 1995.

GABRIEL, Pere, "A vueltas y revueltas con la historia social obrera en España. Historia obrera, historia popular e historia contemporánea", *Historia Social*, n° 22, (1995), pp. 43-53.

- "Hablemos de los trabajadores y de la clase obrera" en RIVERA, Antonio, ORTIZ DE ORRUÑO, José M^a y UGARTE, Javier (eds.), *Movimientos sociales en la España Contemporánea*, Madrid, Instituto Universitario de Historia Social / Asociación de Historia Contemporánea / Abada, 2008, pp. 127-168.

GALA VALLEJO, César, *Las pensiones de invalidez, jubilación y muerte y supervivencia en el sistema de la Seguridad Social española*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.

GALÁN RODRÍGUEZ, Carmen, "Cncta kn nstrs (conecta con nosotros): los SMS universitarios", *Revistas de Estudios de Juventud*, n° 8, (2007), pp. 63-74.

GALEANO, Eduardo, en *Patatas arriba La escuela del mundo al revés*, 10^a ed., Buenos Aires, Catálogos, 2006 [1998].

GALÍ, Jordi [et al.], *La economía española: una visión diferente*, Barcelona, Antoni Bosch / CREI, 1996.

GALIACHO, Juan Luis y BERBELL, Carlos, *Filesa. Las tramas del dinero negro en la política*, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

GALINDO MARTÍN, Miguel Ángel, "Distribución de la renta, crecimiento y política fiscal", *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, n° 25, (2004).

- RIBEIRO SORIANO, Domingo (eds.), *Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica. Dossier monográfico, Información Comercial Española*, n° 858, (2011).

GALLAGHER, Tom y WILLIAMS, Alan M. (eds.), *Southern European socialist. Parties, elections and the challenge of government*, Manchester, Manchester University Press, 1989.

- "The Portuguese Socialist Party: the pitfalls of being first" en id. y WILLIAMS, Alan M. (eds.), *Southern European socialist. Parties, elections and the challenge of government*, Manchester, Manchester University Press, 1989, pp. 12-33.

GALLAND, Olivier, *Sociologie de la jeunesse. L'entrée dans la vie*, Paris, Armand Colin, 1991.

GALLASTEGUI ZALAICA, M^a del Carmen, “Los acuerdos de Maastricht y el Plan de Convergencia: una visión crítica”, *Información Comercial Española*, n° 710, (1992), pp. 101-114.

GALLEGU, Carmen, “Economía sumergida y mercado de trabajo: aproximación histórica”, *Acciones e investigaciones sociales*, n° 3, (1995), pp. 19-32.

GALLEGU, Ferrán, *Los mitos de la transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia*, Barcelona, Crítica, 2008.

GALLEGU, Raquel y PORRAS, Antonio, “La política de gestión pública en España, 1982-1996: emprendedores políticos y ventanas de (in) oportunidad” en *VII Congreso Internacional de la CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública*, Lisboa, octubre 2002 [www.clad.es/congresos].

GALLERANO, Nicola, (ed.), *L'uso pubblico della storia*, Milano, Franco Angeli, 1995.

- Storia e uso pubblico della storia” en id. *L'uso pubblico della storia*, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 17-32.

- “Historia y uso público de la historia”, *Pasajes*, n° 24 (2007), pp. 87-97.

GALLIE, Duncan, MARSH, Catherine y VOGLER, Carolyn (eds.), *Social Change and the Experience of Unemployment*, Oxford, Oxford University Press, 1994.

GÁLVEZ, Lina, *Estadísticas históricas del mercado de trabajo en Andalucía en el siglo XX*, Sevilla, Instituto de Estadística de Andalucía, 2008.

GÁLVEZ BIESCA, Sergio, “La primera etapa de la política laboral del Gobierno Socialista (1982-1992). La reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984. Algunas hipótesis de trabajo”, *Hispania Nova*, n° 3, (2003), pp. 203-228.

- *La estrategia de la modernización de los gobiernos socialistas (1982-1992). Un análisis histórico del proceso de dualización del mercado de trabajo: la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984*, II vols., Universidad Complutense de Madrid, septiembre 2004 [inédito].

- y MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “Las contradicciones del socialismo: una aproximación a la historia política del PSOE en la Transición (1972-1986)” en *La transición a la democracia en España: actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos: Guadalajara, 4-7 de noviembre 2003*, II vols., Guadalajara, Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial, 2004, vol. II [CD-ROM].

- “La campaña del miedo: el papel de ABC en las elecciones de octubre de 1982”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, n° 16, (2004), pp. 371-398.

- “La «cultura de la precariedad» o los «usos y costumbres» de las empresas. Un balance histórico del impacto generacional de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984”, *Sociedad y Utopía*, n° 25 (2005), pp. 19-52.

- “Del socialismo a la modernización: los fundamentos de la «misión histórica» del PSOE en la transición”, *Historia del Presente*, n° 8, (2006), pp. 199-218.

- “El proceso por la recuperación de la «memoria histórica»”, *International Journal of Iberian Studies*, n° 19 (I) (2006), pp. 25-51.

- (coord.), *Generaciones y memoria de la represión franquista*. Dossier monográfico, *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, n° 6/7, (2006/2007).

- y MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “Historia de una colaboración y competición política durante el franquismo: las relaciones del PCE-PSOE (1944-1974)” en BUENO LLUCH, Manuel, HINOJOSA, José y GARCÍA GARCÍA, Carmen (eds.), *Historia del PCE: I Congreso, 1920-1977*, II vols., Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007, vol. II, pp. 45-58.

- “Rupturas, continuidades y tendencias en la Historia del Movimiento Obrero: la formación histórica de la «generación de la cultura de la precariedad»”, *XIX y Veinte. Revista de Historia y Pensamiento Contemporáneo*, n° 1, (2007), pp. 11-54.

- (ed.), *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social*. Dossier monográfico *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, n° 29 (2007).

- “Las relaciones capital-trabajo en España” en id. (ed.), *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social*. Dossier monográfico *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, nº 29 (2007), pp. 105-113.
- “La generación de la «cultura de la precariedad»: una aproximación desde la historia del movimiento obrero” en id. (ed.), *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social*. Dossier monográfico *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, nº 29, (2007), pp. 336-366.
- “Rupturas, continuidades y tendencias en la historia del Movimiento Obrero: la formación histórica de la «generación de la cultura de la precariedad»”, *XIX y Veinte. Revista de Historia y Pensamiento Contemporáneo*, nº 1, (2007), pp. 11-54.
- (ed.), *30º Aniversario de la Legalización del PCE*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007.
- (coord.), *La memoria como conflicto. Memoria e historia de la Guerra Civil y el Franquismo*. Dossier monográfico, *Entelequia. Revista Interdisciplinar*, nº 7 (2008).
- “Presentación. La «memoria democrática» como conflicto” en id. (coord.), *La memoria como conflicto. Memoria e historia de la Guerra Civil y el Franquismo*. Dossier monográfico, *Entelequia. Revista Interdisciplinar*, nº 7 (2008), pp. 1-53.
- (coord.), *La clase trabajadora, después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 26/27 (2008).
- “Presentación. Viejos y nuevas preguntas en torno a las relaciones capital-trabajo” en id. (coord.), *La clase trabajadora, después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 26/27 (2008), pp. 7-28.
- “La «extraña» derrota del movimiento obrero” en id. (coord.), *La clase trabajadora, después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 26/27 (2008), pp. 83-116.
- “El Movimiento Obrero en la España del tiempo vivido: del sujeto político al nuevo «precariado»” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y id. (coord.), *Manuel Tuñón de Lara, diez años después. La huella de un legado*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 30 (2008), pp. 199-226.
- (dir.), *Delincuentes políticos. Obreros, sindicalistas, trabajadores en el Madrid del final del franquismo*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Ministerio de Presidencia, 2008.
- “Obreros, militantes antifranquistas y dirigentes sindicales en el Madrid del último franquismo. Estudio introductorio” en id. (dir.), *Delincuentes políticos. Obreros, sindicalistas, trabajadores en el Madrid del final del franquismo*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Ministerio de Presidencia, 2008, pp. 447-541.
- “Delincuentes políticos: biografía de una «generación de militantes antifranquistas»” en id. *Delincuentes políticos. Obreros, sindicalistas, trabajadores en el Madrid del final del franquismo*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas / Ministerio de Presidencia, 2008, pp. 542-613.
- “Las vicisitudes del historiador en su sociedad: una propuesta de diálogo” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio, GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, SOUTO KUSTRÍN, Sandra y BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés (coords.), *El valor de la historia: homenaje al profesor Julio Aróstegui*, Madrid, Editorial Complutense, 2009, pp. 331-346.
- “Memorias, Historia, Derechos Humanos, Políticas Públicas. Reflexiones en torno a la práctica historiográfica. Un balance revisitado” en ARÓSTEGUI, Julio y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (eds.), *Generaciones y memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria*, Valencia, Universitat de València, 2010, pp. 15-36.
- “Jaime Sartorius: en primera línea en la reconstrucción de la «lógica democrática»” en GÓMEZ ALÉN, José y VEGA, Rubén (coords.), *Materiales para el estudio de la abogacía*

- antifranquista (Vol. II)*, Madrid, Ediciones GPS / Fundación de Abogados de Atocha, 2011, pp. 385-442.
- (dir. / ed.), *El 'nuevo' movimiento obrero en Madrid (1964-1977). Memoria, historia e identidad*, Sevilla, Atrapasueños / Fundación de Investigaciones Marxistas [en prensa].
- GAMAZO, Juan Carlos (ed.), *Economía de la evasión fiscal: judicialización de los incumplimientos tributarios*, Valladolid, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1994.
- "Principales trabajos empíricos en materia de evasión fiscal", *Anales de Estudios Económicos y Empresariales*, nº 9, (1994), pp. 199-218.
- GAMBINO, Ferruccio, "A Critique of the Fordism of the Regulation School", *Wildcat-Zirkular*, nº 28/29, (1996), pp. 139-160
- GAMBLE, Andrew y WALTON, Paul, *El capitalismo en crisis: la inflación y el Estado*, Madrid, Siglo XXI, 1997.
- GÁMIR, Luis, "Nuevos valores económicos y políticos", *Información Comercial Española*, nº 691, (1991), pp. 109-121.
- "Convergencia y credibilidad", *Economistas*, vol. X, nº 53, (1992), pp. 21-23.
 - "Realidad y política económica socialista: una interpretación" en RUPÉREZ, Javier y MORO, Carlos (eds.), *El Decenio de González*, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia / Encuentro, 1992.
 - (dir.) y PEINADO PÉREZ, José Luis (coord.), *La convergencia real de la economía española*, Madrid, PricewaterhouseCoopers, 1999.
 - "Política de privatizaciones en España", *Revista Española de Control Externo*, vol. I, nº 2, (1999), pp. 15-30.
 - *Las privatizaciones en la España actual*, Madrid, Pirámide, 1999.
 - "El precio de venta de las empresas privatizadas", *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, nº 4, (1999), pp. 283-294.
- GARAYALDE, Iñigo y SALVADOR, Lide, *Indicadores del mercado de trabajo: análisis de las fuentes de información e indicadores ocupacionales*, Vitoria / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996.
- GARCÉS, Mario, "Actores y disputas por la memoria en la transición siempre inconclusa" en GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen y NICOLÁS MARÍN, Encarna (eds.), *Procesos de construcción de la democracia en España y Chile*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 79, (2010), pp. 147-169.
- GARCÉS, Joan E., *Soberanos e intervenidos: estrategias globales, americanos y españoles*, Madrid, Siglo XXI, 2008.
- GARCÍA, Alejandro (ed.), *Los crímenes de estado y su gestión: dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la justicia penal internacional*, Madrid, Los Libros de Catarata, 2009.
- GARCÍA, Miguel Ángel, "Cambios en la Encuesta de Población Activa en 2005", *Índice: revista de estadística y sociedad*, nº 11, (2005), pp. 6-10.
- GARCÍA, Soledad, "Ciudadanía, bienestar y desigualdad social en España", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 41, (1988), pp. 63-79.
- GARCÍA ABAD, José, *Las mil caras de Felipe González*. Madrid, La Esfera de los Libros, 2006.
- *Adolfo Suárez: una tragedia griega*, Madrid, La Esfera de los Libro, 2005.
- GARCÍA-ABADILLO, Casimiro, *De la euforia al descrédito: crónica del dinero*, Madrid, Espasa-Calpe, 1995.
- *El balance: luces y sombras de la España del PSOE*, Madrid, Temas de Hoy, 1997.
- GARCÍA ALLER, Marta, *La generación precaria*. Madrid, Espejo de Tinta, 2006

GARCÍA ALONSO, José M^a y IRANZO, Juan Emilio, “Sector energético: Hacia una nueva ordenación” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 129-150.

GARCÍA ATANCE, Salvador [et al.], *Historias de una década. Sistema financiero y economía española, 1984-1994*, Madrid, AB Asesores, 1995.

GARCÍA BECEDAS, Gabriel, “El Acuerdo Nacional sobre Empleo y la cláusula de «consolidación sindical»”, *Civitas*, n° 13, (1983), pp. 63-92.

- *Reconversiones industriales y ordenamiento laboral*, Madrid, Tecnos, 1989.

GARCÍA BENAVIDES, Fernando y SERRA, Carles, “Evaluación de la calidad del sistema de información sobre lesiones por accidentes de trabajo en España”, *Arch Prev Riesgos Labor*, vol. VI, n° 1, (2003), pp. 26-30.

- “Análisis de los mecanismos de producción de las lesiones leves por accidentes de trabajo en la construcción en España”, *Gaceta Sanitaria*, vol. XVII, n° 5, (2003), pp. 353-359.

GARCÍA BLANCO, José M^a, “Declive económico y políticas regionales: el caso de Asturias”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 83, (1998), pp. 87-119.

GARCÍA BROSA, Gemma, *Prestaciones por desempleo y duración del paro*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996.

GARCÍA CALAVÍA, Miguel Ángel, “El mito de los nuevos paradigmas productivos”, *Sociológica: Revista de Pensamiento Social*, n° 3, (1998), pp. 121-146.

- SANTOS ORTEGA, Antonio (eds.), *El reparto del trabajo*, Valencia, Germania, 1998.

- *La producción de Mitos y Milagros. La reestructuración del trabajo desde los años ochenta*, Tesis Doctoral, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001.

- *La reestructuración del trabajo desde los años ochenta: continuidad y cambio*, Valencia, Germania, 2003.

- “La «edad de oro» de las relaciones industriales: elementos de interpretación teórica”, *Papers*, n° 75, (2005), pp. 11-33.

- “Conflicto laboral y protesta obrera en el tardofranquismo. El caso de la Unión Naval de Levante”, *Sociología del Trabajo*, n° 62, (2008), pp. 120-145.

- GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales en el estado español (1976-2005)”, *Arxius*, n° 18, (2008), pp. 93-117.

GARCÍA CASTRO, Eladio, *La crisis económica: Alternativa democrática al Pacto de la Moncloa*, Madrid, Manifiesto Editorial, 1978.

GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.), *Conflictividad y movimientos sociales en Castilla y León: del tardofranquismo a la democracia*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010.

GARCÍA CRESPO, Miguel Ángel, “Jóvenes y multiaventura: un modelo de éxito” en *Jóvenes y campamentos de verano*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, n° 72, (2006), pp. 129-137.

GARCÍA de BLAS, Antonio, “Algunas reflexiones sobre la negociación colectiva en España en el último quinquenio” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, II, pp. 859-880.

- “La financiación de la Seguridad Social en España: fiscalización frente a disminución de cotizaciones”, *Información Comercial Española*, n° 630-631, (1986), pp. 77-86.

- “El sistema de protección al desempleo”, *Papeles de Economía Española*, n° 26, (1986), pp. 325-327.

- GARCÍA de BLAS, Antonio, “El problema del paro juvenil en España” en *Economía y sociología del trabajo*, n° 1-2, (1988), pp. 101-106.

GARCÍA DIEZ, Juan Antonio, *La política económica frente a la crisis*, Madrid, Ministerio de Economía y Comercio / Secretaría General Técnica, 1981.

- “Política de ajuste”, *Información Comercial Española*, nº 676/677, (1989), pp. 59-70.

GARCÍA de la BORBOLLA, Luis Díez, “Convenios de la OIT en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo: análisis de contenido. Normativa interna y comunitaria (Directivas) relacionada con los mismos”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 2, (1997), pp. 165-200.

GARCÍA de LEÓN, M^a Antonia, *Élites discriminadas: sobre el poder de las mujeres*, Madrid, Anthropos, 1994.

GARCÍA de POLAVIEJA, Javier, “The dualisation of unemployment risks class and insider / outsider patterns in the Spanish Labour Market”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 128, (1998).

- “How do labour market experiences affect political attitudes? Analysing the political effects of labour market dualisation in Spain?”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 142, (1999).
- “¿Qué es el voto de clase? Los mecanismos del voto de clase en España”, *Zona Abierta*, nº 96-97, (2001), pp. 173-213
- “El paro te cambia: los mecanismos causales de voto de castigo en las elecciones generales de 1996”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 180, (2002)
- *Estables y precarios. Desregulación laboral y estratificación en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2003.
- “Temporary contracts and labour market segmentation in Spain: An Employment-Rent Approach”, *European Sociological Review*, vol. XIX, nº 5, (2003), pp. 501-517.
- “¿Por qué es tan alta la tasa de empleo temporal? España en perspectiva comparada”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 113, (2006), pp. 77-108
- “Por una sociología científica: la obra de John Goldthorpe”, *Claves de Razón Práctica*, nº 201, (2010), pp. 71-76.

GARCÍA DELGADO, José Luis y SEGURA, Julio, *Reformismo y crisis económica: la herencia de la dictadura*, Madrid, Saltes, 1977.

- (dir.), *Economía española de la transición y la democracia, 1977-1986*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1990.
- (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999.
- y JIMÉNEZ, Juan Carlos, “El proceso de modernización económica: perspectiva histórica y comparada” en id. (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 7-30.
- “Modernización económica y democracia en España”, *Economistas*, vol. XXII, nº 100 [extra] (2004), pp. 26-31.

GARCÍA DURÁN, Raúl, “La lucha de clases: pragmatismo ¿para quién?” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 429-462.

GARCÍA ESPEJO, M^a. Isabel, *Recursos formativos e inserción laboral de jóvenes*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1998.

GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier, *Estudios sobre el Gobierno*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2007.

GARCÍA FERRANDO, Manuel, “Actitudes de los empresarios españoles ante el cambio social y la crisis económica”, *Revista Internacional de Sociología*, nº 49, (1984), pp. 85-100.

GARCÍA GARCÍA, Antonio Claret, *Economía y comportamiento electoral de los andaluces: 1982-2004*, Sevilla, Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2008.

GARCÍA GARCÍA, José Tomás, “Revisión del debate teórico-metodológico sobre la integración de las dimensiones micro y macro en investigación social”, *Sistema*, nº 223, (2011), pp. 77-97.

GARCÍA GRECIANO, Begoña, *Distribución de la renta, crecimiento y convergencia real en España*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997.

GARCÍA GÓMEZ, Montserrat (coord.), *Diez años después de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2007.

GARCÍA HERMOSO, José Manuel, “El INI como grupo de negocios: presente y futuro”, *Papeles de Economía Española*, nº 38, (1989), pp. 139-153.

GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús y NIETO SAINZ, Joaquín, “Aproximación a los costes de la siniestralidad laboral en España”, *Revista de Derecho Social*, nº 24, (2003), pp. 217-224.

GARCÍA LÓPEZ, José y ALVIRA MARTÍN, Francisco Ricardo, “La crisis económica: actitudes de consumidores y empresarios”, *Papeles de Economía Española*, nº 2, (1980), pp. 99-133.

- “La familia española y el paro”, *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 40-56.

- ALVIRA MARTÍN, Francisco Ricardo, “Los españoles y la fiscalidad: la pérdida de la ilusión financiera”, *Papeles de Economía Española*, nº 30-31, (1987), pp. 90-107.

GARCÍA MOLTALVO, José, “Tipos de interés a corto plazo en España”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. VI, nº 18, (1998), pp. 5-25.

GARCÍA MAINAR, M^a Inmaculada y MONTUENGA GÓMEZ, Víctor Manuel, “Causas de los accidentes de trabajo en España: análisis longitudinal con datos de panel”, *Gaceta Sanitaria*, vol. XXIII, nº 3, (2009), pp. 174-178.

GARCÍA MONTERO, José Manuel, *Estrategias de inserción laboral: una aproximación sociológica de transición a la vida adulta a través de las redes sociales*, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2011.

GARCÍA MURCIA, Joaquín, “Perspectivas jurídicas de la reforma del mercado de trabajo” en MONEREO PÉREZ, José Luis (coord.), *La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral (XII Jornadas Universitarias andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)*, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 13-52.

- (dir.), *Condiciones de empleo y de trabajo en la negociación colectiva: estudio de los convenios colectivos de sector (1994-1996)*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.

- CASTRO ARGÜELLES, M^a Antonia, *Legislación histórica sobre huelga y conflicto colectivo de trabajo*, Navarra, Aranzadi, 2011.

GARCÍA NINET, José Ignacio, “Final de una controversia jurisprudencial y doctrinal: la inclusión en la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, de las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo y fondo de garantía salarial”, *Tribuna Social*, nº 14, (1992), pp. 29-31.

- (dir.) y ARÁNTZAZU, Vicente Palacio (coord.), *Contratación temporal y medidas de fomento de empleo*, Barcelona, Atelier, 2009.

GARCÍA PÉREZ, José Ignacio, “Las tasas de salida del empleo y del desempleo en España (1978-1993)”, *Investigaciones Económicas*, vol. XXI, nº 1, (1997), pp. 29-53.

- *The nineties in Spain: so much flexibility in the labor market?* Sevilla, Centra, 2002.

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio, *El proyecto de Ley Orgánica de Huelga: la huelga en los servicios esenciales de la comunidad como telón de fondo*, Santander, Universidad de Cantabria, 1993.

- “El salario mínimo interprofesional” en VILLA, Luis Enrique de la (coord.), *Estudios sobre el salario*, Madrid, ACARL, 1993, pp. 303-362.

GARCÍA PIÑEIRO, Ramón, “Minería y huelga general: una década de huelgas generales en la minería del carbón. España, 1982-1991” en BONAMUSA, Francisco (ed.), *La Huelga General. Dossier monográfico*, Ayer, nº 4, (1991) pp. 213-234.

- “¿El ocaso de un mito? Movilizaciones y radicalismo minero durante la Transición (1977-1982)”, *Sociología del trabajo*, nº 30, (1997), pp. 123-148

- “El declive de HUNOSA. Resistencia obrera y sindical al ocaso de la minería pública” en PONS, Jerónima, FLORENCIO PUNTAS, Antonio y ARENAS POSADAS, Carlos (eds.), *Trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea*, Sevilla, Mergablum, 2001, pp. 405-418.
- “El obrero ya no tiene quien le escriba. La movilización social en el «tardofranquismo» a través de la historiografía más reciente”, *Historia del Presente*, nº 1, (2002), pp. 104-116.

GARCÍA PIQUERAS, Manuel, *Los contratos temporales: el empleo incentivado*, Granada Comares, 1993.

GARCÍA RUBIO, M^a Amparo, *La inspección de trabajo y Seguridad Social: doctrina y jurisprudencia*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999.

GARCÍA SÁINZ, Cristina, “Revisiones de conceptos en la Encuesta de Población Activa”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 61, (1993), pp. 173-184.

GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Las dos opciones del PSOE”, *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 37-48.

- “Los límites infranqueables”, *Leviatán*, nº 10, (1982), pp. 13-31.
- “Evolución ideológica del socialismo en la España actual”, *Sistema*, nº 68-69, (1985), pp. 61-78.
- *Marxismo y Estado*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986.
- “El bienio socialista en perspectiva. Evolución ideológica del socialismo en la España actual” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista a debate*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1986.
- *Repensar la izquierda. Evolución ideológica del socialismo en la España actual*, Barcelona / Iztapalapa (México), Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana, 1993.
- “Democracia de partidos y democracia en los partidos” en TEZANOS, José Félix (ed.), *La democracia post-liberal*, Madrid, Sistema, 1996, pp. 351-372
- “Cinco tareas para los intelectuales de la izquierda” en ÁGUILA, Rafael del (coord.), *Los intelectuales y la política*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2003, pp. 87-124.
- *Historia, memoria y futuro: Nicolás Redondo (1977-2007)*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007.

GARCÍA SERRANO, Carlos y ARRANZ MUÑOZ, José, “¿Qué ha sucedido con la estabilidad del empleo en España?: un análisis desagregado con datos de la EPA (1987-2003)”, *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 4, (2004), pp. 1-80.

GARCÍA VALVERDE, M^a Dolores [et al.], “La protección por desempleo: el subsidio asistencial” en MONEREO PÉREZ, José Luis, MOLINA NAVARRETE, Cristóbal y MORENO VIDA, M^a Nieves (coord.), *La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras: homenaje al profesor José Vida Soria con motivo de su jubilación*, Granada, Comares, 2008, pp. 1075-1094.

GARCÍA VALDÉS, Carlos, *El delito político*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976.

GARGAS FERNÁNDEZ, Josep, *Análisis crítico del sistema español de pensiones no contributivas*, Navarra, Aranzadi, 2002.

GARRIDO, Luis, *Prospectiva de las ocupaciones y la formación en la España de los noventa*, Madrid, Instituto de Estudios y Análisis Económicos / Ministerio de Economía y Hacienda, 1991.

- GIL CALVO, Enrique (eds.), *Estrategias familiares*, Madrid, Alianza, 1993.
- “La temporalidad ¿pacto intergeneracional o imposición?” en CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ed.), *La duración del contrato de trabajo*, Madrid, Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, 1996, pp. 47-91.
- REQUENA, Miguel, *La emancipación de los jóvenes en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / Instituto de la Juventud, 1996.

- “Paro juvenil o desigualdad”, *Revista de Investigaciones Sociológicas*, nº 75, (1996), pp. 236-267.
- GARRIDO LUQUE, Alicia, “Psicología social del desempleo” en ESTRAMIANA, José Luis, id. y TORREGROSA, José Ramón (coords.), *Psicología social aplicada*, Madrid, McGraw-Hill, Interamericana, 1996, pp. 121-154.
- GARRITSEN de VRIES, Margaret, *The IMF in a changing world 1945-85*, Washington D. C., International Monetary Fund, 1986.
- *Balance of payments adjustment, 1945 to 1986: the IMF experience*, Washington, International Monetary Fund, 1987.
- GARZA, Enrique de la, “¿Fin del Trabajo o Trabajo sin Fin?” en CASTILLO, Juan José (ed.), *El trabajo del futuro*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1999, pp. 13-40.
- NEFFA, Julio (comps.), *El futuro del trabajo, el trabajo del futuro*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002, pp. 11-31.
- “Problemas clásicos y actuales de la crisis del trabajo” en id. y NEFFA, Julio (comps.), *El futuro del trabajo, el trabajo del futuro*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002, pp. 11-31.
- GASH, Vanessa, “Bridge or Trap? Temporary Workers’ Transitions to Unemployment to the Standard Employment Contract”, *European Sociological Review*, vol. XXIV, nº 5, (2008), pp. 651-658.
- GAUDEMAR, Jean-Paul, *El orden y la Producción*, Madrid, Trotta, 1991.
- GAURON, André y BILLAUDOT, Bernard, *Crecimiento y crisis. Hacia un nuevo crecimiento*, Madrid, Siglo XXI, 1987.
- GAZZO, Emanuele, “El largo camino hacia la construcción de Europa” *Papeles de Economía Española*, nº 52-53, (1992), pp. 32-38.
- GENESCA, Eric y SALAS FUMÁS, Vicente, “Convergencia microeconómica España-Europa, 1982-1992”, *Documento de Trabajo. Serie amarilla. Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social*, nº 116, (1995).
- GENOVESE, Eugene, “Materialism and Idealism in the History of Negro Slavery in the Americas”, *Journal of Social History*, vol. I, nº 4, (1968), pp. 371-394.
- GENOVESE, Elisabeth, “The Political Crisis of Social History: A Marxian Perspective”, *Journal of Social History*, vol. X, nº 2, (1976), pp. 205-220.
- y id., La crisis política de la historia social. La lucha de clases como objeto y estudio”, *Historia Social*, nº 1, (1988), pp. 77-114.
- GENIEYS, William, *Las élites españolas ante el cambio de régimen político. Lógica de Estado y dinámicas centro-periferias en el siglo XX*, Madrid, Siglo XXI / Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004.
- GEORGE, Susan, “A Short History of Neoliberalism. Twenty Years of Elite Economics and Emerging Opportunities for Structural Change” en BELLO, Walden, BULLARD, Nicola y MALHOTRA, Kamal (eds.), *Global finance. New thinking on Regulating Capital Markets*, London, Zed Books, 2000, pp. 27-35.
- *Informe Lugano*, Barcelona, Icaria / Intermón, 2005.
- GERSHUNY, Jonathan I. y MILES, Ian D., *La nueva economía de servicios. La transformación del empleo en las sociedades industriales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.
- GETE CASTRILLO, Pedro, “Convenio aplicable y Salario Mínimo Interprofesional”, *Relaciones Laborales*, nº 2, (1996), pp. 1336-1338.
- GEYER, Robert R., *Exploring European social policy*, Cambridge, Polity Press, 2000.
- GIBBINS, John R. (eds.), *Contemporary Political Cultural. Politics in a Postmodern Age*, London, Sage Publications, 1990.
- GIL, Fernando, *La exclusión social*, Barcelona, Ariel, 2002.

GIL-CALVO, Enrique y MENÉNDEZ VERGARA, Elena, *Ocio y prácticas culturales de los jóvenes*, vol. I, dentro de ZARRAGA, José Luis (dir.), *Informe Juventud de España 1985. La inserción de los jóvenes en la sociedad*, VII vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 1985.

- *La mujer cuarteada*, Barcelona, Anagrama, 1991.
- “La rendición de cuentas de los responsables electos”, *Revista de Libros*, nº 90, (2004), pp. 16-17.
- *Crisis crónica: la construcción social de la gran recesión*, Madrid, Alianza, 2009.

GIL, Luis, IGLESIAS, Manuel y ROA, Fernando, *Estatuto de los Trabajadores: amplia Jurisprudencia, más de tres mil sentencias, comentarios*, Madrid, Colex, 1992.

GIL RODRÍGUEZ, Germán, *Jóvenes ante la nueva economía: contradicciones entre la evolución del trabajo y la oferta educativa*, Valencia, ISO [2006].

GIL-RUIZ GIL-ESPARZA, Carmen Luisa y IGLESIAS QUINTANA, Jaime, “El gasto público en España en un contexto descentralizado”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 47, (2007), pp. 185-206.

GILL, Louis, *Fondements et limites du capitalisme*, Montréal, Les Éditions du Boréal, 1996.

- *Fundamentos y límites del capitalismo*, Madrid, Trotta, 2002.

GILLESPIE, Richard, *The Spanish Socialist Party: a history of factionalism*, Oxford / New York, Clarendon Press / Oxford University Press, 1989.

- *Historia del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Alianza, 1991.
- PATERSON, William E. (eds.), *Rethinking social democracy in Western Europe*, London, Frank Cass, 1993.

GILLIS, John Randall, *Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations, 1770-Presente*, New York / San Francisco / London, Academic Press, 1974.

GIMÉNEZ, Laura, “Las políticas de juventud: Hacia unas políticas emancipatorias” en BENEDICTO, Jorge y MORÁN, M^a Luz (eds.), *Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y construcción de ciudadanía entre los jóvenes*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2003, pp. 159-179.

GIMENO ULLASTRES, Juan Antonio (coord.), *El consumo en España: un panorama general*, Madrid, Visor Dis, 2000.

GINER, Salvador y SEVILLA, Eduardo, “From despotism to parliamentarianism: class domination and political order in the Spanish State” en SCASE, Richard (ed.), *The State in Western Europe*, London, Croom Helm, 1980, pp. 197-229.

- “Southern European Socialism in Transition”, *West European Politics*, vol. VII, nº 2, (1984), pp. 138-157.
- PÉREZ YRUELA, Manuel, “Corporativismo: el estado de la cuestión”, *Revista de Investigaciones Sociológicas*, nº 31, (1985), pp. 9-46.
- LEGUINA, Joaquín, TEZANOS, José Félix, “Transformaciones sociales y apoyos estratégicos del proyecto socialista”, *Leviatán*, nº 35, (1989), pp. 84-100.

GINER de GRADO, Carlos, “El fraude fiscal en España”, *Documentación Social*, nº 76, (1989), pp. 137-154.

GIRÁLDEZ NÚÑEZ, M^a Teresa y ALLONA ALBERICH, M^a Dolores, “La medición del empleo y el paro en España y la Unión Europea”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 148-149, (1999), pp. 33-55.

- PÉREZ INFANTE, José Ignacio y SIMÓN PÉREZ, Hipólito J., *Situación actual de la medición de la cobertura de la negociación colectiva en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002.

GIRÓN, José, *Breve historia de la UGT de Asturias: 1975-1986*, Oviedo, Fundación Asturias, 1998.

GIRÓN GONZÁLEZ, Alicia, RODRÍGUEZ LÓPEZ, Patricia y DÉNIZ ESPINÓS, José (coords.), *Crisis financiera: nuevas manías, viejos pánicos*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2010.

GLYN, Andrew, "The cost of stability: Advanced capitalist countries in the 80's", *New Left Review*, vol. I, nº 195, (1992).

- MILIBAND, David (eds.), *Paying for Inequality. The Economical Cost of Social Injustice*, London, Rivers Osam Press, 1994.
- (ed.), *Social Democracy in Neoliberal Times. The Left and Economic Policy since 1980*, New York, Oxford University Press, 2001.

GOBERNADO, Rafael, "Modernización y cambio social" en RAMOS, Antonio (ed.), *España Hoy. Sociedad*, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 231-255.

GOBIERNO DE ESPAÑA, *Presupuestos Generales del Estado 1992 y adaptación de normas tributarias a la legislación de la CEE*, Barcelona, Difusora de Normas Jurídicas, 1992.

GODÉ SÁNCHEZ, José Antonio, "Los gastos sociales en el Presupuesto de 1990", *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 131-144.

GOERLICH GISBERT, Francisco José y VILLAR NOTARIO, Antonio, "Desigualdad y bienestar en España y sus Comunidades Autónomas (1973-2003)", *Revista de Economía Aplicada*, vol. XVII, nº 50, (2009), pp. 119-152.

GOERLICH PESET, José Mª (coord.), *El tiempo de trabajo en la negociación colectiva*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008.

GOERTZEL, Ted, "Generational conflict and social change", *Youth and Society*, vol. III, nº 3, (1972), pp. 327-352.

GOLDTHORPE, John, *Orden y conflicto en el capitalismo contemporáneo: estudios sobre economía política en los países de la Europa Occidental*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991 [1984].

- "De vuelta a clase y el estatus. Por qué debe reivindicarse una perspectiva sociológica de la desigualdad social", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 137, (2012), pp. 43-58.

GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), *Políticas públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno*, Barcelona, Ariel, 1998.

GOMÁRIZ, Enrique, "El espacio electoral del PSOE", *Leviatán*, nº 1, (1978), pp. 99-115.

- "La sociología de Felipe González", *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 61-76.
- "El ejemplo francés", *Leviatán*, nº 5, (1981), pp. 55-62.

GÓMEZ ALÉN, José y VEGA, Rubén (coords.), *Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista (Vol. I)*, Madrid, Fundación de Abogados de Atocha de CCOO de Madrid / Ediciones GPS, 2010.

- *Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista (Vol. II)*, Madrid, Ediciones GPS / Fundación de Abogados de Atocha, 2011.

GOMÉZ CUESTA, Cristina, "Luchas urbanas, voces ciudadanas: Los orígenes del movimiento vecinal, 1964-1982" en GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.), *Conflictividad y movimientos sociales en Castilla y León: del tardofranquismo a la democracia*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, pp. 95-124.

GÓMEZ de ENTERRÍA, MELIS, Francisco y ROMERO, Desiderio, "Evaluación del cumplimiento en el IVA: Revisión de las estimaciones. Años 1990 a 1994", *Documento de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 18, (1998).

GÓMEZ FUENTES, Ángel, *Así cambiará España. La batalla del Mercado Común*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

GOMÉZ GARCÍA, Pedro (coord.), *Las ilusiones de la identidad*, Valencia, Frónesis, 2001.

GÓMEZ GÓMEZ-PLANA, Antonio, "Incidencia de las cotizaciones sociales en el mercado de trabajo español", *Información Económica Española*, nº 837, (2007), pp. 139-156.

GÓMEZ LLORENTE, Luis, *Aproximación a la historia del socialismo español*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1972.

- “Introducción” en CLAUDÍN, Fernando [et al.], *Teoría socialista del Estado*, Madrid, Mañana, 1978.
- GÓMEZ LLORENTE, Luis, “En torno a la ideología y la política del PSOE”, *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 23-36.
- *La ética del pablismo*, Madrid, Fundación Progreso y Cultura [2008].
- GÓMEZ del MORAL, Mariano, “La armonización estadística en el mercado del Sistema Estadístico Europeo (SEE)”, *Índice: revista de Estadística y Sociedad*, nº 16, (2006), pp. 12-14
- GÓMEZ MUÑOZ, Ricardo, “Nuevas tipologías y modelos de localización industrial en España surgidos tras la crisis” en *Revista de Estudios Regionales*, nº 22, (1988), pp. 83-112.
- GÓMEZ RODA, Alberto, *Comisiones Obreras y represión franquista: València, 1958-1972*, Valencia, Universitat de València, 2004.
- GÓMEZ SALA, Jesús Salvador y MORENO DOMÍNGUEZ, M^a Mercedes, “La imposición sobre el consumo y la fiscalidad sobre los turismos. Un análisis comparado”, *Cuadernos de Ciencias Económicas y empresariales. Papeles de trabajo*, nº 31, (2005).
- GÓMEZ SALVADOR, Ramón y GARCÍA PERA, Pilar, “Elaboración de series históricas de empleo a partir de la Encuesta de Población Activa (1964-1992)”, *Documentos de Trabajo del Banco de España*, nº 9, (1994), pp. 1-63.
- GÓMEZ VICENTE, M^a Teresa, SÁNCHEZ y SÁNCHEZ-AMAYA, M^a Isabel, “La desregulación del mercado de trabajo español en el período 1984-1995 y sus efectos sobre el empleo”, *Estudios de Economía Aplicada*, nº 8, (1997), pp. 109-140.
- GONZALO GONZÁLEZ, Bernardo, “Las pensiones no contributivas en Europa” en MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Los sistemas de Seguridad Social y las nuevas realidad sociales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, pp. 123-142.
- GONZÁLEZ, Ángeles, “Confrontación y consenso: la concertación social y el juego de intereses (1977-2010)” en *Pasado y Memoria*, nº 9, (2010), pp. 101-128.
- GONZÁLEZ, Felipe, *¿Qué es el socialismo?* Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976.
- “La construcción de una Europa socialista y democrática” en PSOE, *Conferencia de los Partidos Socialistas de Europa del Sur*, Madrid, PSOE, 1976.
- [et al.] *Socialismo es Libertad. Escuela de Verano del PSOE 1976*, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1976.
- y GUIDONI, Pierre, *Entretiens sur le socialisme en Espagne*, Paris, Tema, 1976.
- “La unidad de los socialistas”, *Sistema*, nº 15, (1976), pp. 45-51.
- y GUERRA, Alfonso, *El Partido Socialista Obrero Español*, Bilbao, Albia, 1977.
- *España y su futuro*, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1978.
- *Programa de gobierno presentado en las Cortes por Felipe González. Secretario General del PSOE: 28 de mayo de 1980*, Madrid, Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 1980.
- *Un estilo ético: conversaciones con Víctor Márquez Reviriego*, Barcelona, Argos Vergara, 1982.
- *Discurso de investidura*, 2^a ed., Madrid, Servicio Central de Publicaciones / Presidencia de Gobierno, Madrid, 30 de noviembre de 1982.
- y GUERRA, Alfonso, *Felipe González, de Suresnes a la Moncloa: recuerdos e impresiones de Alfonso Guerra*, Madrid, Novatex, 1984.
- “Entrevista” en PSOE, *Hacia el cambio... 100 días en el Gobierno*, Madrid, PSOE, 1983, pp. 169-172.
- y GUERRA, Alfonso, *Felipe González, de Suresnes a la Moncloa: recuerdos e impresiones de Alfonso Guerra*, Madrid, Novatex, 1984.

- “La cohesión y la solidaridad en la construcción europea”, *Sistema*, nº 86-87, (1988), pp. 11-20.
 - “Prólogo” en MARTÍNEZ COBO, Carlos y MARTÍNEZ COBO, José, *La segunda renovación. Intrahistoria del PSOE*, IV vols., Barcelona, Plaza & Janés, 1991, vol. IV.
 - y CEBRIÁN, José Luis, *El futuro no es lo que era*, Madrid, Suma de Letras, 2002.
 - *Memorias del futuro: reflexiones sobre el tiempo presente*, Madrid, Aguilar, 2003.
- GONZÁLEZ, Juan Jesús y REQUENA, Miguel (eds.), *Tres décadas de cambio social en España*, Madrid, Alianza, 2005.
- GARRIDO, Luis Joaquín, “Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales” en GONZÁLEZ, Juan Jesús y REQUENA, Miguel (eds.), *Tres décadas de cambio social en España*, Madrid, Alianza, 2005, pp. 89-134..
 - BOUZA, Fermín, *Las razones del voto democrático en España, 1977-2008*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009.
- GONZÁLEZ, Sara y MASCAREÑAS, Juan, *El sistema monetario europeo*, Madrid, UDEMA, 1993.
- GONZÁLEZ-ANLEO, Juan, *El sistema educativo español*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1985.
- GONZÁLEZ BLANCH, Francisco, “El Fondo de Cohesión Económica y los criterios de convergencia con la UE”, *Boletín Económico ICE*, nº 2474, (1995), pp. 33-34.
- GONZÁLEZ BLASCO, Pedro, ANDRÉS ORIZO, Francisco, TOHARIA CORTÉS, José Juan y ELZO, Javier, *Jóvenes españoles 89*, Madrid, Fundación Santa María, 1989.
- “¿Qué dicen las investigaciones de los jóvenes?”, *Documentación Social*, nº 95, (1994), pp. 106-117.
 - “I+D en la España de los noventa (Gastos, ingresos y personal)”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 85, (1999), pp. 131-170.
 - ELZO, Pedro, ELZO, Javier, GONZÁLEZ-ANLEO, Juan Mª, LÓPEZ RUIZ, José Antonio y VALLS IPARRAGUIRE, Maite, *Jóvenes Españoles 2005*, Madrid, SM, 2006.
 - (dirs. / coords.), *Jóvenes españoles 2010*, Madrid, SM, 2010.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, ARÓSTEGUI, Julio y SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “La violencia política en la España del siglo XX”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 22, (2000), pp. 53-94.
- “El Estado ante la violencia” en JULIÁ, Santos (dir.), *Violencia política en la España del siglo XX*, Madrid, Taurus, 2000, pp. 365-406.
 - (ed.), *Juventud y política en la España contemporánea*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 59, (2005).
- GONZÁLEZ CALVET, Josep, “La liberalización como estrategia socialdemócrata”, *Mientras Tanto*, nº 38, (1989), pp. 23-42.
- “Crisis, transición y estancamiento. La política española, 1973-1982” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 133-176.
 - *Els contextos de l'acció sindical, 1976-1988*, Barcelona, Fundació Jaume Bofill / Fundació Volkswagen, 1990, vol. II, dentro de, AGUILAR, Salvador (dir.), *Sindicalisme i canvi social a Espanya, 1976-1988*, VI vols., Barcelona, Fundació Bofill / Fundació Volkswagen, 1991.
 - “Prestaciones sociales, eficiencia y equidad. Análisis del gasto de protección social en España, 1982-1992” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los ochenta*, Madrid / Barcelona, Icaria / Instituto Sindical de Estudios, 1993.
- GONZÁLEZ CASANOVA, José A., “La tarea institucional del PSOE”, *Leviatán*, nº 5, (1981), pp. 47-53.
- *La derecha contra el Estado: el liberalismo autoritario en España (1833-2008)*, Lleida, Milenio, 2009.

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, M^a Luisa, *La fiscalidad del patrimonio y de las relaciones familiares económicas familiares*, Navarra, Aranzadi, 2002.

GONZÁLEZ de ANDRÉS, Enrique, “La lucha contra el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo de Sagunto (Valencia)”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, n° 23, (2011), pp. 200-220.

GONZÁLEZ de LENA ALVAREZ, Francisco, “La normativa laboral sobre el trabajo de la mujer: Evolución en la década de los ochenta”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n° 13-14, (1991), pp. 138-143.

- “Reducción y reordenación de la jornada de trabajo en España”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n° 15-16, (1992), pp. 80-87.

GONZÁLEZ DURO, Enrique, *Biografía psicológica de Felipe González*. Madrid, Temas de Hoy, 1996.

GONZÁLEZ ENCINAR, José Juan, “El supuesto giro a la derecha en las elecciones al Parlamento gallego”, *Revista de Estudios Políticos*, n° 25, (1982), pp. 53-79

GONZÁLEZ GÓMEZ, Santiago, “Las reivindicaciones por una jornada legal de ocho horas de trabajo: bandera histórica del primer sindicalismo en España” en ORTEGA ESTEBAN, José (ed.), *Relaciones sociolaborales: aspectos jurídicos, económicos y sociales*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, pp. 179-193.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Antonio, “Los salarios en los últimos años: entre la culpabilización y el remedio de todos los males”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n° 25-26, (1994), pp. 258-268.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Manuel J., “La empresa en la historia del pensamiento económico” en LLORDEN, Moisés (comp.), *De empresas y empresarios en la España contemporánea*, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1995, pp. 11-28.

GONZÁLEZ MADRID, Damián A. (coord.), *El franquismo y la transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen y NICOLÁS, Encarna, “Perspectivas historiográficas en las transiciones políticas contemporáneas a la democracia” en GONZÁLEZ MADRID, Damián A. (coord.), *El franquismo y la transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, pp. 201-221.

- y id. (eds.), *Procesos de construcción de la democracia en España y Chile*. Dossier monográfico, *Ayer*, n° 79, (2010), pp. 147-169.

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Clara Isabel y SENRA DÍAZ, Eva, “Employment and unemployment data: Differences between EPA and other Official Statistics”, *Boletín de Estadística e Investigación Operativa*, vol. XXVI, n° 3, (2012), pp. 208-210.

GONZÁLEZ MORENO, Miguel y CUADRARO ROURA, Juan Ramón, “Incidencia de las nuevas tecnologías en la organización y localización de los servicios de empresas”, *Revista de Estudios Regionales*, n° 22, (1988), pp. 29-68.

GONZÁLEZ MUÑOZ, M^a del Rosario, *La siniestralidad en España*, Málaga, Ediped, 2008 [CD-ROM].

GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel y ROLDÁN ALEGRE, José M^a, “La orientación de la política presupuestaria en España: evolución reciente y perspectivas de convergencia”, *Papeles de Economía Española*, n° 52-53, (1991), pp. 167-179.

- “Privatización y eficiencia: ¿es irrelevante la titularidad?”, *Economistas*, vol. XIII, n° 13, (1995), pp. 32-43.
- MELGUIZO ESTESO, Ángel, “Reforma tributaria y política fiscal” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 579-612.
- “Disciplina presupuestaria, estabilidad macroeconómica y eficiencia de las finanzas públicas” *Papeles de Economía Española*, vol. II, n° 100, (2004), pp. 17-31.

GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio, MARTÍN NÁJERA, Aurelio y GÓMEZ BRAVO, Gutmaro, *100 años Juventudes Socialistas protagonistas del cambio*, Madrid, Fundación Tomás Meabe, 2006.

- “La política archivística del gobierno español y la ausencia de gestión del pasado desde el comienzo de la transición” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Generaciones y memoria de la represión franquista*. Dossier monográfico, *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, nº 6/7, (2006/2007).
 - “Archivos y derechos humanos. Recomendaciones desde el Consejo Internacional de Archivos” en BABIANO, José (ed.), *Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana*, Madrid, Fundación 1º de Madrid / Ediciones GPS, 2010, pp. 189-199.
- GONZÁLEZ-SÁNCHEZ, Enrique, “Las negociaciones de adhesión de España y las Comunidades Europeas desde abril de 1984 hasta su conclusión”, *Revista de Instituciones Europeas*, vol. XII, nº 2, (1985), pp. 439-464.
- GONZÁLEZ TEMPRANO, Antonio José Manuel, “Gasto público y crecimiento económico en el Estado del bienestar”, *Hacienda Pública Española*, nº 2 [extraordinario], (1994).
- (dir.), *La política de gasto social (1984-1996): en la administración del Estado y de las Comunidades Autónomas*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.
 - (dir.), *La consolidación del estado del bienestar en España, 1993-2000*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003.
- GONZÁLEZ URBANEJA, Fernando, *Banca y poder: la pasión por ser banquero*, Madrid, Espasa Calpe, 1993.
- GONZALO MORELL, Constantino, *Movimiento vecinal y cultura política democrática en Castilla y León. El caso de Valladolid (1964-1986)*, Tesis Doctoral, Unversidad de Valladolid, 2011.
- “Aportación del movimiento vecinal a la cultura democrática de la Transición en Valladolid. Los vecinos contra la dictadura” en ALDUNATE, Oscar y HEREDIA, Iván (coords.), *I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC [1º, 2007, Zaragoza]*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2008.
- GORDO, Esther y L’HOTELLERIE, Pilar, “La competitividad de la industria española en una perspectiva macroeconómica”, *Banco de España. Boletín Económico*, octubre de 1993, pp. 43-52.
- GORDON, David M., EDWARDS, Richard y REICH, Michael, *Trabajo segmentado, trabajadores divididos: la transformación histórica del trabajo en Estados Unidos*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.
- GORZ, André, *Técnica, tècnics i lluita de classes*, Barcelona, La Magrana, 1979.
- *Adiós al proletariado. Más allá del socialismo*, Barcelona, Ed. 2001 [1981].
 - *Metamorfosis del trabajo: búsqueda del sentido. Crítica a la razón económica*, Madrid, Fundación Sistema, 1997.
- GOSWAMI, M., “Recordando el futuro” en *De la historia cultural a la historia social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 69, (2011), pp. 107-118.
- GOUREVITCH, Peter A., *Politics in hard times: comparative responses to international economic crisis*, Ithaca, Cornell University Press, 1986.
- GOUX, Dominique y MAURIN, Eric, *Les nouvelles classes moyennes*, Paris, Editions du Seuil, 2012.
- GRIMALDOS, Alfredo, GARCÍA, Andrés, *Contra el pacto de la Moncloa: algunas respuestas de la clase obrera*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1978.
- *La CIA en España: Espionaje, intrigas y políticas al servicio de Washington*, Madrid, Debate, 2006.
- GRAMSCI, Antonio, *Antología*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, p. 19 [selección, traducción notas de Manuel Sacristán].
- GRANDE ARANDA, Juan Ignacio, *Políticas de juventud en España y la Unión Europea*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2010.
- GRANJA, José Luis de la y REIG TAPIA, Alberto (eds.), *Manuel Tuñón de Lara. El compromiso con la historia. Su vida y su obra*, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1993.

GROSSBART, Stephen R., “Quantitative and Social Science Methods for Historians. An Annotated Bibliography of Selected Books and Articles”, *Historical Methods*, vol. XXV, nº 1, (1992), pp. 100-120.

GRUPPI, Luciano, *Il concetto di egemonia in Gramsci*, Roma, ER, 1972.

GUAL, Jordi, JÓDAR ROSELL, Sandra y RUIZ POSINO, Alex, “El problema de la productividad en España: ¿Cuál es el papel de la regulación?”, *Documentos de Economía “La Caixa”*, nº 1, (2006).

GUALDA CABALLERO, Estrella, *Cambio social y tecnológico en el triángulo industrial de Cádiz, Huelva y Sevilla (1990-1991)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1995.

GÜELL-ROTLLAN, Maia, “Fixed-Term Contracts and Unemployment: An Efficiency Wage Analysis”, *Discussion Papers. Centre for Economic Performance. London School of Economic*, nº 0461, (2000).

GUERRA, Alfonso, *XXVII Congreso del PSOE*, Madrid, Avance, 1977.

- (ed.), *Este viejo y nuevo partido [De Congreso a Congreso]*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1979.
- [et al.], *Nuevos horizontes teóricos para el socialismo: Jávea II* [II Encuentro sobre el futuro del socialismo, 22, 23 y 24 de septiembre de 1986], Madrid, Sistema, 1987.
- [et al.], *Nuevos horizontes teóricos para el socialismo: Jávea II* [2º Encuentro sobre el futuro del socialismo, 22, 23 y 24 de septiembre de 1986], Madrid, Sistema, 1987.
- [et al.], *El nuevo compromiso europeo. Jávea III* [III Encuentro sobre el Futuro del Socialismo, Jávea, Septiembre, 1987], Madrid, Sistema, 1987.
- “La renovación del proyecto socialista”, *Leviatán*, nº 45, (1991), pp. 51-62.
- TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del cambio: diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992.
- CABALLERO, Abel y TEZANOS, José Félix (eds.), *La socialdemocracia ante la economía de los años noventa*, Madrid, Sistema, 1994.
- “La crisis del neoliberalismo y las tareas del socialismo”, *Sistema*, nº 145-146, (1998), pp. 5-14.
- *Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982)*, Madrid, Espasa, 2004.
- *Dejando atrás los vientos. Memorias (1982-1991)*, Madrid, Espasa, 2006.

GUERRA, Antonio, Alfonso Guerra. *La divertida biografía de un sultán destronado*, 3ª ed., Madrid, Temas de Hoy, 1991.

GUERRERO, Diego, *Acumulación del capital, distribución de la renta y crisis de rentabilidad en España, 1954-1987*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1989.

- *Competitividad: teoría y política*, Barcelona, Ariel, 1995.
- (ed.), *Macroeconomía y crisis mundial*, Madrid, Trotta, 2000.
- *La explotación. Trabajo y Capital en España (1945-2001)*, Barcelona, El Viejo Topo, 2006.
- *Un resumen completo de ‘El capital’ de Marx*, Madrid, Maia, 2008.
- “Economía franquista y capitalismo. Una interpretación alternativa a la del antifranquismo liberal postfranquista” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (dir. / ed.), *El ‘nuevo’ movimiento obrero en Madrid (1964-1977). Memoria, historia e identidad*, Sevilla, Atrapasueños / Fundación de Investigaciones Marxistas [en prensa].

GUICHOT, Emily, “Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y propuestas legislativas”, *Documento de Trabajo. Fundación Alternativas*, nº 170, (2011).

GUILLÉN, Ana M., “Regímenes del bienestar y roles familiares: un análisis del caso español”, *Papers*, nº 53, (1997), pp. 45-63.

GUILLÉN, Mauro F., “Procesos de cambio en la estructura ocupativa del sector sanitario español”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 37, (1987), pp. 173-206.

GUINDAL, Mariano y SERRANO, Rodolfo, *La otra transición: Nicolás Redondo. El sindicalismo socialista*, Madrid, Unión, 1986.

- *Un oficio de fracasados: libelo pro y contra el periodismo*, [Córdoba], Berenice, 2006.
- *El declive de los dioses. Los secretos de la transición económica española desvelados por un testigo de excepción*, Barcelona, Planeta, 2011 [con la colaboración de Mar Díaz-Varela].

GUNDER FRANK, André, *El desafío de la crisis*, Madrid, IEPALA, 1988.

GUNTHER, Richard, "Leyes electorales, sistema de partidos y élites", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 47, (1989), pp. 73-106.

- MONTERO, José Ramón, *The politics of Spain*, New York, Cambridge University Press, 2009.
- *The dynamics of electoral competition in a modern society: models of spanish voting behavior, 1979 and 1982*, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1991.

GUTIÉRREZ, Antonio, "Prólogo. Más allá de la conmemoración del 14 de diciembre" en ALVAREZ PÉREZ, José Manuel y CAMPOS MARTÍN, Ángel, *Ayer, hoy y mañana del 14-D*, Madrid, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 1990, pp. 7-17.

- "Los sindicatos y la acción sindical en los años noventa" en *El sindicalismo. Dossier monográfico, Economía y sociología del trabajo*, nº 10, (1990), pp. 38-46.

GUTIÉRREZ, José Luis *Miguel Boyer, el hombre que sabía demasiado*, 2ª ed., Madrid, Temas de Hoy, 1992.

- MIGUEL, Amando de, *La ambición del Cesar: un retraso político y humano de Felipe González*, Madrid, Temas de Hoy 1993.

GUTIÉRREZ, Pablo Carlos, *El crecimiento de los servicios. Causas, repercusiones y políticas*, Madrid, Alianza, 1993.

GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, Secundino J., *Aproximación histórica a las organizaciones empresariales en España*, II vols., Madrid, CEIM, 2001, vol. II, *Las organizaciones empresariales en la transición: 1975-1978 (Del Consejo Nacional de empresarios a la CEOE y CEIM)*.

GUITTON, Christophe, REYNAUD, Emmanuèle y MARUANI, Margaret (coords.), *Debates sobre el empleo*, III vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991-1992.

HABERMAS, Jürgen, *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973.

- *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Buenos Aires, Amorrurtu, 1973.

HALL, Peter A. (ed.), *The Political Power of Economic Ideas. Keynesianism across Nations*, Princeton, N. J. Princeton University Press, 1989.

HALL, Stuart, *The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis on the Left*, New York, Norton, 1988.

HAMERMESH, Daniel y REES, Albert, *Economía del trabajo y de los salarios*, Madrid, Alianza, 1984.

HAMMAN, Kerstin, *The politics of industrial relations: labor unions in Spain*, New York, Routledge, 2012.

HARNECKER, Marta, *La izquierda después de Seattle*, Madrid, Siglo XXI, 2002.

HARO GARCÍA, Julia, *Medición de la desigualdad y del bienestar social. Análisis de la distribución de la renta (1981-1991)*, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 1994.

HARALD KÄDING, Klaus, "Negociaciones colectivas sobre la reducción y reestructuración del tiempo de trabajo en los Estados miembros de la Comunidad Europea", *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 15-16, (1992), pp. 154-163.

HART, R.A., *Reducción de la jornada de trabajo: un dilema para la negociación colectiva*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987.

HARVEY, David, *A brief history of neoliberalism*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

- *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal, 2007.

- FERGUSON, Niall, MAIER, Charles S., MANELA, Erez y SARGENT, Daniel J. (eds.), *The shock of the global. The 1970's in perspective*, Cambridge, Harvard University Press, 2010.
 - *The enigma of capital and the crises of capitalism*, London, Profile Books, 2010.
 - *El enigma del capital y las crisis del capitalismo*, Madrid, Akal, 2012.
- HAYEK, Friedrich A., *Camino de servidumbre*, Madrid, Alianza, 2005.
- HEBENSTREIT, M^a, “El movimiento obrero en Puerto de Sagunto desde 1958 hasta el fin del régimen franquista” en CABANA IGLESIA, Ana, LANERO TÁBOAS Daniel y SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor Manuel (eds.), *VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo [7º. 2009, Santiago de Compostela]*, Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo, 2010 [CD-ROM].
- “Conflicto y cultura de negociación en Altos Hornos de Sagunto, 1959-1975” en *Historia, Trabajo y Sociedad*, n° 1, (2010), pp. 7-28.
- HEFFER, “Une histoire scientifique: la Nouvelle Histoire Économique”, *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, vol. XXXII, n° 4, (1977), pp. 824-842.
- HERAS, Raúl, *Enciclopedia política y atlas electoral de la democracia española*, Madrid, Temas de Hoy, 1997.
- HERCE, José A. y PÉREZ-DÍAZ, Víctor (dirs.), *La reforma del sistema público de pensiones en España*, Barcelona, La Caixa, 1995.
- “Papeles y el debate sobre las pensiones en España, 1979-2004”, *Papeles de Economía Española*, vol. I, n° 100, (2004), pp. 2-9.
- HERMIDA, José M., *Cómo leer y entender la prensa económica*, Madrid, Temas de Hoy, 1993.
- HERMÓGENES, Manuel, *El agujero: PSV y los dineros de UGT*, Madrid, Temas de Hoy, 1995.
- HERNÁNDEZ, Abel, *Crónica de la cruz y la rosa. Los socialistas y la Iglesia hoy*, Barcelona, Argos-Vergara, 1984.
- HERNÁNDEZ, Eduardo y LEÓN PANIAGUA, José, “Hacia la desaparición de la vivienda pública”, *Alfuz*, n° 46, (1987), pp. 86-93.
- HERNÁNDEZ, Félix, “La jornada de reconciliación nacional del 5 de mayo de 1978”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Hª Contemporánea*, n° 20, (2008), pp. 281-293.
- HERNÁNDEZ ANDRE, Juan, *Fluctuaciones económicas en la España del siglo XX*, Madrid, Abacus, 1995.
- HERNÁNDEZ ANDREU, Juan, *Economía política de la transición en España (1973-1980)*, Madrid, Editorial Complutense, 2004.
- HERNÁNDEZ GARCÍA, Gloria, “La deuda pública en la democracia”, *Papeles de Economía Española*, n° 68, (1996), pp. 214-226.
- HERNÁNDEZ GARCÍA, Gloria, “Evolución histórica de la financiación del déficit público”, *Información Comercial Española*, n° 826, (2005), pp. 125-134.
- HERNÁNDEZ MARCOS, Lucinio, *El diálogo social: políticas de concertación social en España: neocorporativismo y diálogo social*, [Madrid], Bubok, [2002].
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, “La historia cultural en España: tendencias y contextos de la última década” en COLL i AMARGOS, Joaquim y LLORENS i VILA, Jordi (coords.), *Història i catalanisme. Balanç historiogràfic*. Dossier monográfico, *Cercles. Revista d'Història Cultural*, n° 4, (2001), pp. 57-91.
- *Tendencias historiográficas actuales: escribir historia hoy*, Madrid, Akal, 2004.
 - LANGA, Alicia (eds.), *Sobre la historia actual. Entre política y cultura*, Madrid, Abada, 2005.
- HERNÁNDO SÁNCHEZ, Antonio, “La nueva estadística de demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal” en MARCOS GARCÍA, Carmen (dir.), *El papel de los registros administrativos en análisis social y económico y el desarrollo del sistema estadístico*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2006, pp. 363-380.

HERNANDO, Ignacio y VALLÉS, Javier, “Productividad sectorial: comportamiento cíclico en la economía española”, *Documentos de Trabajo. Servicios de Estudios del Banco de España*, nº 9323, (1993).

HERNANZ MARTÍN, Virginia, *El trabajo temporal y la segmentación. Un estudio de las transiciones laborales*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003.

HERRADOR BUENDÍA, Félix, *Política social de mercado de trabajo en España: el origen del proceso de europeización de la política de fomento del empleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008.

HERRERA, Francisco (ed.), *Las grandes ciudades en la década de los noventa*, Madrid, Alfa Delta [1994].

HERRERA, José Díaz y DURÁN, Isabel, *El dinero del poder: la trama económica de la España socialista*, 6ª ed., Madrid, Cambio 16, 1991.

- TIJERAS, Ramón, *Pacto de silencio: la herencia socialista que Aznar oculta*, Madrid, Temas de Hoy, 1996.

HERRERO, José Luis y ECHEBARRÍA, Goio, “La evolución de la economía española durante el período 1940-1988 a partir de un indicador de la tasa de beneficio del sector industrial”, *Información Comercial Española*, nº 665, (1989), pp. 9-24.

- “Las relaciones de trabajo” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 373-398.

HERRERO de MIÑÓN, MIGUEL, *Memorias de estío*, Madrid, Temas de Hoy, 1993.

HERRERO MADARIAGA, Juan, RANCAÑO MARTÍN, Asunción y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Germán, *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio: normativa básica y doctrina administrativa concordada*, Granada, Comares, 1993.

HERRERO VÁZQUEZ, Francisco, *Hacia una reconstrucción del materialismo histórico*, Madrid, Istmo, 2005

HEYWOOD, Paul, “Mirror-images: The PCE and PSOE in the Transition to Democracy in Spain”, *West European Politics*, vol. X, nº 2, (1987), pp. 193-210.

- (ed.), *Politics and policy in democratic Spain. No longer different?* London, Frank Cass Publishers, 1999.
- “Power Diffusion or Concentration? In Search of the Spanish Policy Process?” en HEYWOOD, Paul (ed.), *Politics and policy in democratic Spain. No longer different?* London, Frank Cass Publishers, 1999, pp. 103-123.

HICKS, John, *A theory of economic history*, London, Oxford University Press, 1974.

- *Una teoría de la historia económica*, Madrid, Aguilar, 1984.
- *Riqueza y bienestar: ensayos sobre la teoría económica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
- *A market theory of money*, Oxford, Clarendon Press, 1990.

HIDALGO VEGA, Álvaro y PÉREZ CAMARERO, Santiago, *Aspectos salariales de los jóvenes trabajadores*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2004.

HILL, Christopher, *The role of elites in the Spanish Transition to democracy (1975-1981): motors of change*, Lewinston, New York, Edwin Mellen Press, 2007.

HIRSCH, Abraham y MARCHI, Neil de, *Milton Friedman: economics in theory and practice*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1990.

HOBBSAWM, Eric J., *Worlds of Labour. Further studies in the History of Labour*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1984.

- *El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera*, Barcelona, Crítica, 1987.
- “De la historia social a la historia de la sociedad”, *Historia Social*, nº 10 (1991) [1971], pp. 19-20.

- *Politics for a Rational Left. Political writing 1977-1988*, London, Verso / Marxism Today, 1989.
 - *Política para una izquierda racional*, Barcelona, Crítica, 2000.
 - RANGER, Terence (eds.), *La invención de la tradición*, Barcelona, Crítica, 2002.
 - “El desafío de la razón: Manifiesto para la renovación de la historia”, *Polis: revista académica de la Universidad Bolivariana*, nº 11 (2005).
 - *How to change the World: Tales of Marx and Marxism, 1840-2011*, London, Little Brown, 2011.
 - *Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo, 1840-2011*, Barcelona, Crítica, 2011.
- HOLLOWAY, John, *Crack capitalism*, London, Pluto Press, 2010.
- HOPKIN, Jonathan, *El partido de la transición: Ascenso y caída*, Madrid, Acento, 2000.
- HUCHA CELADOR, Fernando de la, “La deuda pública: análisis de su evolución jurídica desde la aprobación de la Constitución de 1978”, *Cuadernos de Derecho Público*, nº 25, (2005), pp. 175-214.
- HUFF, Darrel y GEIS, Irving, *Cómo mentir con estadísticas*, [Barcelona] Ares y Mares, 2011 [1965].
- HUERTAS, Emilio (ed.), *Los desafíos de la competitividad: la innovación organizativa y tecnológica en la empresa española*, Bilbao, Fundación BBVA, 2002.
- HUGUET ROIG, Ana, *Segmentación en el mercado de trabajo español*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1999.
- HUNEEUS, Carlos, *La Unión de Centro Democrático y la transición democrática española*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1985.
- HUNT, Lynn (ed.), *The New Cultural History: essays*, Berkeley / Los Ángeles, University of California Press, 1989.
- HUNTINGTON, Samuel P., “Desarrollo político y deterioro político” en CARNERO, Teresa (ed.), *Modernización, desarrollo político y cambio social*, Madrid, Alianza, 1992, pp. 167-220.
- *La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX*, Barcelona, Paidós, 1994.
- HUSSON, Michel, *Un pur capitalisme*, Lausanne, Page Deux, 2008.
- *Capitalismo puro*, Madrid, Maia, 2009.
 - “Le débat sur le taux de profit”, *Inprecor*, nº 562-563, 2010.
- HURTADO, Jorge, *Implicaciones sociales de la economía sumergida: una investigación sociológica*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1996.
- HUYSEN, Andreas (ed.), *El modernismo después de la posmodernidad*, Barcelona, Gedisa, 2011.
- HYMAN, Richard, *Relaciones industriales. Una introducción marxista*, Madrid, Blume, 1981.
- IBÁÑEZ, Jesús, “Hacia un concepto teórico de «explotación»”, *Sistema*, nº 53, (1983), pp. 39-56.
- “Las medidas de la sociedad”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 29, (1985), pp. 85-128.
- IBARRA, Pedro, IDOYAGA, José Vicente y ZALLO, Ramón, “Ideologías y medios de comunicación en los 80” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 745-746.
- IBÁRRURI, Dolores [et al.], *Historia del Partido Comunista de España (versión abreviada)*, París, Editions Sociales, 1960.
- [et al.], *Guerra y Revolución en España, 1936-1939*, III vols., Moscú, Ediciones Progreso, 1966-1977.
- IBARZ, Jordi, “De lo concreto y lo general. Un estudio de caso del movimiento obrero y su práctica historiográfica” en ARENAS, Carlos, FLORENCIO, Antonio y MARTÍNEZ RUIZ, José Ignacio (coords.), *Mercados y organización del trabajo en España: siglo XIX y XX*, Sevilla, Atril, 1998, pp. 391-396.

- IGARTURA MIRÓ, M^a Teresa, *Sistema de prevención de riesgos laborales*, Madrid, Tecnos, 2008.
- IGGERS, Georg G., *La ciencia histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales*, Barcelona, Labor, 1995.
- IGLESIA, Jesús de (coord.), *El orden económico mundial. Fondo Monetario, Banco Mundial y GATT*, Madrid, Síntesis, 1994.
- IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada: lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes socialistas de sus años de gobierno*, Madrid, Aguilar, 2003.
- IGLESIAS, Francisco, *Historia de una empresa periodística. Prensa Española: editora de 'ABC' y 'Blanco Negro' (1891-1978)*, Madrid, Prensa Española, 1980.
- IGLESIAS, Rodrigo, "La concertación social desde la perspectivas de las organizaciones empresariales"
- ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos y patronal en España*, Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 145-179.
- IGLESIAS de USSEL, Julio, "¿Conflicto generacional o armonía familiar?: Los jóvenes en España" en LÓPEZ CASERO, Francisco, BERNECKER, Walter L. y WALDMAN, Peter (comps.), *El precio de la modernización: formas y retos del cambio de valores en la España de hoy*, Madrid, Iberoamericana, 1994, pp. 149-182.
- IGLESIAS TURRIÓN, Pablo, "Algunos centenares de jóvenes de la izquierda radical: desobediencia italiana en Madrid (2000-2005)", *Revista de Estudios de Juventud*, n° 77, (2007), pp. 245-265.
- IKASSON, Kerstin, "Employment contracts and psychological contracts in Europe. Results from a pilot study", *Saltsa Report*, n° 1, (2003).
- ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE DOCTORALES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, *Desmontando a ni-ni. Un estereotipo juvenil en tiempos de crisis*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2011.
- IMEDIO OLMEDO, Luis José, "El comportamiento de la recaudación de los impuestos lineales", *Hacienda Pública Española*, n° 152, (2000), pp. 67-75.
- INCHAURRALDE BESGA, Carlos, OLIVARES RIVERA, Carmen, VÁZQUEZ ORTA, Ignacio y GUILLÉN CALVE, Ignacio (eds.), *El discurso de la convergencia europea en los textos sobre el Tratado de Maastricht. Un recorrido pragmalingüístico por algunos textos periodísticos e institucionales británicos y españoles*, Zaragoza, Egido, 1996.
- INGLEHART, Ronald, *El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1991.
- *Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1999.
- INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, *Actuación del crédito oficial en los procesos de reconversión industrial y reindustrialización (1964-1985)*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Instituto de Crédito Oficial, 1986.
- INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, *Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 1990*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1990.
- *Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 1991*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1990.
- *Pesupuestos de las Administraciones Públicas: evolución en el periodo 1986-1990*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991.
- *Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 1992*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991.
- INSTITUTO DE LA JUVENTUD, *Informe sobre las políticas de juventud en España*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1999.
- (GRUPO TELECYL), *Relaciones intergeneracionales entre padres e hijos*, Madrid, INJUVE, 2002 [inédito].
- INSTITUTO DE LA MUJER, *Indicadores sociales para la mujer: ponencias presentadas en el seminario 'Indicadores Sociales sobre la Situación de la Mujer'*, Madrid, Instituto de la Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, *Coyuntura del mercado de trabajo*, XXXVIII vols., Madrid, Instituto Nacional de Empleo / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1981-1986

- *Estadística de Empleo: series*, VI vols., Madrid, Instituto Nacional de Empleo / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986-1992.
- *Memoria 1990*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
- *Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) [base 2000 CNAE-93]*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2004 [www.ine.es=ETCL].
- *Desempleados de larga duración en situación de necesidad mayores de 45 años: programa de renta activa de inserción*, Madrid, Instituto Nacional de Empleo, 2001.
- INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IELSS), DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, *Jornadas Europeas sobre Servicios Públicos de Empleo y Política de Empleo: Madrid, 12-16 de diciembre de 1983*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984.
- SERVICIO DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL, *Resumen anual de datos del Observatorio Ocupacional*, Madrid, Instituto Nacional de Empleo / Servicio del Observatorio Ocupacional, 1986-...

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Metodología de la Encuesta de Salarios*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1982.

- *Problemas estadísticos de la economía sumergida [Jornadas para el estudio de los problemas estadísticos de la economía sumergida]*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1986.
- *Disparidades económico-laborales de las provincias españolas*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1986.
- *Encuesta de Población Activa. Descripción de la encuesta, definiciones e instrucciones para la cumplimentación del cuestionario*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1987.
- *Encuesta de Población Activa: series revisadas, 1976-1987*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1988.
- *Encuesta de Población Activa: series revisadas, 1976-1987*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1990.
- *Encuesta de Población Activa 1992: descripción de la encuesta, definiciones e instrucciones para la cumplimentación del cuestionario*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1991.
- *Distribución salarial en España*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1992.
- *Estructura de la clasificación nacional de actividades económicas 1993: (CNAE-93)*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1992.
- *Encuesta de Presupuestos Familiares, 1990/91*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1993.
- *Encuesta de Población Activa. Series homogéneas CNO-94: 3º trimestre 1976 a 4º trimestre 1993*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1994.
- *La condición socioeconómica en la Encuesta de Población Activa*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1996.
- *Desigualdad y pobreza en España: estudio base en la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1973-74, 1980-81 y 1990-91*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística / Universidad Autónoma de Madrid, 1996.
- *Encuesta de Población Activa 2002: tratamiento de la información*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2002.
- *Encuesta de Población Activa. Metodología 2005. Descripción de la encuesta, definiciones e instrucciones para la cumplimentación del cuestionario*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2008.

- *La organización estadística en España*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística [s/f] [original en poder del autor]
- *Evolución de la calidad de los datos de la Encuesta de Población Activa*, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1983-1999?

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, *Diez años del Pacto de Toledo, 1995-2005*, Madrid, Instituto Nacional de la Seguridad Social, 2005.

INSTITUTO SINDICAL DE ESTUDIOS, *Evolución Social en España, 1977-1985*, Madrid, Instituto Sindical de Estudios, 1988.

ÍPOLA, Emilio de, *Althusser, el infinito adiós*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF), *The exchange rate system: lessons of the past and options for the future*, Washington, International Monetary Fund, 1984.

- *Technical assistance and training services of the International Monetary Fund*, Washington, International Monetary Fund, 1985.

IÑIGO CARRERA, Nicolás, “El concepto de clase obrera y la resistencia a la precariedad” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), ed.), *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social*. Dossier monográfico *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, nº 29 (2007), pp. 443-448.

IRANZO, Juan E., “Economía y trabajo: la gran transformación de la sociedad española”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 100, (2002), pp. 231-253.

IRANZO ACOSTA, José Luis y LACOMBA ARIAS, Beatriz, “Evolución de las discrepancias entre el desempleo medido por la EPA y el INEM mediante el coeficiente de desigualdad de Theil”, *Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales*, nº 35, (1998), pp. 111-123

ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE, DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA UNIDAD DE TRENTO, AMITIÉ, INSTUTE FOR EMPLOYMENT STUDIES Y CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS TOMILLO, *¿Atrapados o flexibles? Transiciones de riesgo y políticas a desarrollar para las y los jóvenes trabajadores altamente cualificados en Europa. Resumen Ejecutivo*, [s/l], Comisión Europea, febrero 2012 [www.injuve.es].

IZARD, Miquel, *Industrialización y obrerismo: las tres clases del vapor, 1869-1913*, Barcelona, Ariel, 1973.

IZQUIERDA UNIDA, “Manifiesto. Campaña por las 35 horas por ley y la protección social plena”, *Utopía: Nuestra Bandera*, nº 178, (1998), pp. 119-122.

IZQUIERDO, José Félix, TAGUAS, David y MELGUIZO ESTESO, Ángel, “Imposición y precios de consumo”, *Papeles de Economía Española*, nº 87, (2001), pp. 199-220.

JACKSON, Peter (ed.), *Implementing Government Policy Initiatives: The Thatcher Administration, 1979-1983*, London, Royal Institute of Public Administration, 1985.

JAÉN GARCÍA, Manuel, *Evolución contemporánea del gasto público en España*, Almería, Universidad de Almería, 2004.

JAMESON, Fredric, “The ideology of the Text”, *Salmagundi*, nº 31-32, (1975), pp. 204-246.

- “Postmodernism, or *The Cultural Logic of Late Capitalism*”, *New Left Review*, vol. I, nº 146, (1984), pp. 53-92
- *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Barcelona, Paidós, 2002.

JANER, Miguel, *Todo queda en familia: cien años de oligarquías en España*, Madrid, La Esfera de los Libros, 1993.

JANSEN, Nerina, *La teoría de las generaciones y el cambio social*, Madrid, Espasa-Calpe, 1977.

JARA FUENTE, José Antonio, “Introducción. Lenguaje y discurso: percepciones identitarias y construcciones de identidad”, *Hispania*, vol. LXXI, nº 238, (2011), pp. 315-324.

JAUMANDREU, Jordi, “El empleo en la industria: destrucción de puestos de trabajo, 1973-1982”, *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 108-128.

- FARIÑAS GARCÍA, José Carlos (coords.), *La empresa industrial en la década de los noventa*, Madrid, Fundación Argentería / Visor, 1999.
- JÁUREGUI, Fernando, *La metamorfosis. Los últimos años de Felipe González: de la crisis de Suresnes a la crisis del XXXII Congreso*, Madrid, Temas de Hoy, 1993.
- SORIANO, Manuel, *La otra historia de la U.C.D.*, Madrid, Emiliano Escolar, 1980.
- y MENÉNDEZ, Manuel Ángel, *El hombre que pudo ser Felipe González. Pasión y muerte de Antonio Amat y de otros 'malditos' del PSOE*, Madrid, Temas de Hoy, 1994.
- JAY ALLEN, John, "Hacia una economía posindustrial?" en *Zona Abierta*, nº 65-66, (1993), pp. 45-102.
- JIMÉNEZ, M^a Ángeles, *Juan March*, Madrid, Dersa, 1991.
- JIMÉNEZ, Juan Carlos (ed.), *Empresas y empresarios españoles en la encrucijada de los noventa*, Madrid, Civitas, 1993.
- JIMÉNEZ, Oscar Jaime, *Policía, terrorismo y cambio político en España*, Valencia, Tirant lo Blanch / Universidad de Burgos, 2002.
- JIMÉNEZ, Miguel y SALAS, Rafael, "Causas del incremento en la recaudación del IRPF, 1982-1987", *Hacienda Pública Española*, nº 118, (1991), pp. 141-157.
- JIMÉNEZ BUEDO, M^a, *The trade-off between efficiency and equality: the role of an economic idea in the political strategy of social democratic parties*, Tesis Doctoral, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 2005.
- JIMÉNEZ de AGUILAR, Juan, "La política social después de Maastricht", *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 17, (1992), pp. 57-60.
- JIMÉNEZ DÍAZ, José Francisco, "El liderazgo político de Felipe González en su contexto", *Sociedad y Utopía*, nº 33, (2009), pp. 287-312.
- JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Jaime, "La Seguridad Social en 1990: el presupuesto del consenso social", *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 75-96.
- JIMÉNEZ LOSANTOS, Federico, *Contra el felipismo: crónicas de una década*, Madrid, Temas de Hoy, 1993.
- *La dictadura silenciosa: mecanismos totalitarios en nuestra democracia*, 3^a ed., Madrid, Temas de Hoy, 1993.
- JIMÉNEZ ROGER, Beatriz [et al.], *La emancipación precaria: transiciones juveniles a la vida adulta en España a comienzos del siglo XXI*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008.
- JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos, "Una aproximación a la «policía política» del franquismo: la Sexta Brigada de Barcelona" en DOMÍNGUEZ RAMA, Ana (ed.), *Enrique Ruano. Memoria viva de la impunidad del franquismo*, Madrid, Editorial Complutense, 2011, pp. 197-215.
- JIN, Robert, SHAH, Chandrakant P. y SVOBODA, Tomislav J., "The Impact of Unemployment on Health: A Review of the Evidence", *Journal of Public Health Policy*, vol. XVIII, nº 3, (1997), pp. 275-301.
- JORDÁN GALDUF, Josep M^a, "Balance de la integración de España en la Unión Europea", *Información Comercial Española*, nº 811, (2003), p. 113-132.
- JÓDAR, Pere y MARTÍN ARDILES, Antonio (coords.), *Crisis económica y relaciones industriales. Ensayos sobre el conflicto capital/trabajo. Estrategias alternativas*, Madrid, Grupo Cultural Zero, 1984.
- LÓPE PEÑA, Andreu, *Con el agua al cuello. El trabajo en la economía sumergida*, Madrid, Revolución, 1985.
- LÓPE PEÑA, Andreu, "Trabajo negro y nuevas tecnologías" en BAYLOS, Antonio [et al.], *Nuevas tecnologías y clase obrera*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1989, pp. 63-80.
- "Conflictividad y huelgas generales en España (1993-2004)", *Ius labor*, nº 1, (2006).
- JOHNSON, Christopher, *The Grand Experiment. Mrs Thatcher's Economy and How it Spread*, Boulder, Westview, 1993.

JONES, Gareth St., "El proceso de la configuración histórica de la clase obrera y su conciencia histórica", *Historia Social*, nº 17, (1993), pp. 115-129.

- "The determinist fix: some obstacles to the further development of the linguistic approach to history in the 1990s", *History Workshop Journal*, nº 42, (1996), pp. 19-35.

JORDÁN, Josep Mª y SÁNCHEZ ANDRÉS, Antonio (coords.), *Desafíos actuales de la política económica: un enfoque estructural y social*, Navarra, Thomson Civitas, 2008.

JORDANA, Jacint, , "Del 14-D al sindicalismo de los años noventa: Una aproximación a la política de los sindicatos en España", *Sociología del Trabajo*, nº 8, (1989-1990), pp. 31-58.

- "Reconsidering unión membership in Spain, 1977-1994: halting decline in a context of democratizing consolidation", *Industrial Relations Journal*, vol. XXVII, nº 3, (1996), pp. 211-224.
- RAMIÓ, Carles, "Gobierno y Administración" en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2ª ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 973-1026.

JÓVE PERES, Salvador, "La reforma del Tratado de Maastricht. Aspectos económicos. ¿Qué Europa queremos?", *Utopías: Nuestra Bandera*, nº 168, (1996), pp. 77-86.

JOYCE, Patrick, "The end of social history?", *Social History*, vol. XX, nº 1, (1995), pp. 73-91.

- HALL, John R., *Reworking class*, Ithaca, Cornell University Press, 1997.
- "Refabricating Labour History: or, from Labour History to the History of Labour", *Labour History Review*, vol. LXII, nº 2, (1997), pp. 147-152.
- (ed.), *The Social in Question: New Bearings in History and the Social Sciences*, London, Routledge, 2003.
- "¿El final de la historia social?" en *Ficción, verdad, historia*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 50, (2004), pp. 25-45.
- "Lo social en la historia social" en *¿Qué entendemos hoy por historia social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp. 155-158.

JUAN ASENSJO, Oscar de, "La constitución económica española de 1978 y el PSOE", *Sistema*, nº 53, (1983), pp. 95-106.

- *Introducción a la hacienda pública y la política económica*, Barcelona, PPU, 1989.
- "Teorías sobre el empleo y desempleo. ¿Explica alguna causa la elevada tasa de paro española?" en ROCA JUSMET, Jordi y id., *El desempleo en España. Tres ensayos críticos*, Cuenca, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, pp. 15-62.

JUAN PEÑALOPE, José Luis de, "Ocho años de reforma tributaria", *Información Comercial Española*, nº 617-618, (1985), pp. 133-144.

JUDT, Tony, *Ill Fares the Land*, New York, Penguin Press, 2010.

- *Algo va mal*, 2ª ed., Madrid, Taurus, 2010.
- *Sobre el olvidado siglo XX*, Madrid, Taurus, 2008.

JULIÁ, Santos, "Continuidad y ruptura en el socialismo español en el siglo XX", *Leviatán*, nº 17, (1984), pp. 121-130.

- (coord.), *El socialismo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 367-399.
- *La desavenencia. Partidos, Sindicatos y Huelga General*, Madrid, Aguilar, 1989.
- "Obreros y sacerdotes: cultura democrática y movimientos sociales de oposición" en TUSELL, Javier ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (coords.), *La oposición al régimen de Franco: estado de la cuestión y metodología de la investigación: Actas del Congreso Internacional*

- organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, Madrid, UNED, 1990, pp. 147-161.
- “Sindicatos y poder político en España”, *Sistema*, nº 97, (1990), pp. 41-62.
 - “La historia social y la historiografía española”, *Ayer*, nº 10, (1993), pp. 29-46.
 - PRADRERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la transición*, Madrid, Taurus, 1996.
 - *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Madrid, Taurus, 1996.
 - “Cambio social y cultura política en la transición a la democracia” en MAINER, José Carlos y id. *El aprendizaje de la libertad, 1973-1986: la cultura de la transición*, Madrid, Alianza, 2000, pp. 15-77.
 - JULIÁ, Santos (dir.), *Violencia política en la España del siglo XX*, Madrid, Taurus, 2000.
 - “Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura” en id. (dir.), *Memoria de la guerra y del franquismo*, Madrid, Taurus, 2006, pp. 27-78.
 - “De nuestras memorias y nuestras miserias” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio, *Generaciones y memoria de la represión franquista*. Dossier monográfico, *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, nº 6/7, (2006/2007).
 - “Qué obstáculos para qué transiciones” en RISQUES, Manel, VINYES, Ricard y MARÍ, Antoni (dirs.), *En Transición*, Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona / Dirección de Comunicación de la Diputación de Barcelona, 2008.
 - *Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX*, Barcelona, RBA, 2010.
- JURADO GUERRERO, Teresa, “La precariedad temporal-salarial y sus efectos sobre la formación familiar” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), (ed.), *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social*. Dossier monográfico *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, nº 29 (2007), pp. 367-404.
- JURADO SALVÁN, Enrique, *Crónica de la transición sanitaria en España (1977-1992): del discreto encantado de la reforma prometida al informe abril*, Madrid, E. Jurado D.L., 1993.
- JUSTEL, Manuel, *La abstención electoral en España, 1977-1993*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 1995.
- KAHN, Alfred E., “The Tyranny of Small of Decisions: Market Failures, Imperfections and the Limits of Economics Discourse”, *Kyklos*, vol. XIX, (1966), pp. 23-47.
- KALMANOVITZ, Salomón, “La cliometría y la historia económica institucional: reflejos latinoamericanos”, *Historia Crítica*, nº 27, (2005).
- KATZNELSON, Ira, *Marxism and city*, Oxford, Oxford University Press, 1982.
- KAYE, Harvey J. y McLLELAND, Keith (eds.), *E. P. Thompson. Critical Perspectives*, London, Polity Press, 1990.
- KEANE, John, *Democracia y sociedad civil*, Madrid, Alianza, 1992.
- KERBO, Harold R. y CASADO, Mª Teresa, *Social stratification and inequality. Class conflict in historical perspective and global comparative*, 5th ed., New York, McGraw Hill, 2003.
- *Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica comparada y global*, 5ª ed., Madrid, McGraw Hill Interamericana, 2003.
- KERN, Horst y SCHUMANN, *El fin de la división del trabajo: racionalización en la producción industrial. Situación actual, determinación de las tendencias*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.
- KESSLER, Denis y MASSON, André (eds.), *Cycles de vie et générations*, Paris, Economica, 1985.
- KEY, V.O., “A theory of Critical Elections”, *Journal of Politics*, nº 17, (1955), pp. 3-18.
- KILLICK, Tony (ed.), *Adjustment and financing in the developing world: the role of the International Monetary Fund*, London, International Monetary Fund / Overseas Development Institute, 1982.

- *IMP Programs in Developing Countries: Design and Impact*, London, Routledge, 1995.
- KINDELÁN, Juan Manuel, “Una política económica hacia el socialismo” en PSOE. EQUIPO JAIME VERA, *La alternativa socialista del PSOE (algunas contribuciones)*, Madrid, Cuadernos para el dialogo, 1977, pp. 219-249.
- KINDLEBERGER, Charles P., *La crisis económica, 1929-1939*, Madrid, Capitán Swing, 2009.
- KING, Desmond S., *The New Right: Politics, Markets and Citizenship*, London, MacMillan, 1987.
- KING, J. E., *Una historia de la economía postkeynesiana desde 1936*, Madrid, Akal, 2009.
- KIRK, Neville, “La formación de la clase obrera. En defensa de la clase. Crítica a algunas aportaciones revisionistas sobre la clase obrera inglesa en el siglo XIX”, *Historia Social*, nº 12, (1992), pp. 59-100.
- KITSCHOLT, Herbert, *The Transformation of European Social-Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
- LANGE, Peter, MARKS, Gary y STEPHENS, John D. (eds.), *Continuity and change in contemporary capitalism*, Cambridge / New York, Cambridge University Press, 1999.
- KLEIN, Naomi, *The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism*, Toronto, Random House of Canada Limited, 2007.
- *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*, Barcelona, Paidós, 2007.
- KOCH, Max, *Roads to Post-Fordism. Labour Markets and Social Structures in Europe*, Aldershot, Ashgate, 2006.
- KOCKA, Jürgen, *Historia social: concepto, desarrollo, problemas*, Barcelona, Laia, 1989.
- *Historia Social y conciencia histórica*, Madrid, Marcial Pons, 2002.
- “Historia social. Un Concepto relacional” en *¿Qué entendemos hoy por historia social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp. 159-162.
- KÖHLER, Holm-Detlev, *El movimiento sindical en España: transición democrática, regionalismo, modernización económica*, Madrid, Fundamentos, 1995.
- (coord.), *Asturias, el declive de una región industrial*, Gijón, Trea, 1996.
- KONDRATIEV, Nikolai y GARVY, George, “The Long Waves in Economic Life”, *Review of Economic Statistics*, nº 17, (1935), pp. 105-115.
- *Las ondas largas de la economía*, Madrid, Revista de Occidente, 1945.
- KONKOLEWSKY, Hans-Horst, “Retos de la prevención de riesgos laborales en la Unión Europea”, *Gestión Práctica de Riesgos Laborales*, nº 29, (2006), pp. 20-24.
- KORPI, Walter, *The Democratic class struggle*, London, Routledge & Kegan Paul, 1983.
- “Powers Resources and Employer-Centered Approaches in Explanations of Welfare States and Varieties of Capitalism: Protagonists, Consenters and Antagonists”, *World Politics*, nº 58, (2006), pp. 167-206.
- KORSCH, Karl, *Lucha de clases y derecho del trabajo*, Barcelona, Ariel, 1980.
- KORZENIEWICZ, Roberto P. y MORAN, Timothy P., “World Economic Trends in the Distribution of Income, 1965-1992”, *American Journal of Sociology*, vol. CVII, nº 4, (1997), pp. 1000-1039.
- KOSELLECK, Reinhart, *Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos*, Barcelona, Paidós, 2003.
- KOVÁCS, Ilona y CONCEIÇÃO CERDEIRA, Maria da, “Calidad del empleo, ¿quiebra generacional «versus» quiebra societal?”, *Sociología del Trabajo*, nº 66, (2009), pp. 73-106.
- KRUGMAN, Paul R., *El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual*, 2ª ed., Barcelona, Crítica, 2009.
- KUMAR, Krishan, *From post-industrial to post-modern society: new theories of the contemporary world*, Oxford, B. Blackwell, 1995.

KURTH, James y PETRAS, James (eds.), *Mediterranean Paradoxes. Politics and Social Structure in Southern Europe*, Oxford, Berg Publishers, 1993.

KUZNETS, Simon, *Aspectos cuantitativos del desarrollo económico*, México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1959.

- *El crecimiento económico moderno*, Madrid, Aguilar, 1973.

LABEAGA AZCONA, José M^a, MARCO ALEDO, Mariluz y JIMÉNEZ MARTÍN, Sergi, “Algunos factores explicativos de la existencia de huelgas durante la negociación colectiva”, *Investigaciones Económicas*, vol. XX, n° 2, (1996), pp. 217-242.

LABORDA PERALTA, Ángel, “La convergencia nominal como base de la UEM y de la convergencia real: retos para la economía española” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas españoles*, IX vol., Barcelona, Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 1999, vol. VIII, pp. 425-484.

LACALLE, Daniel, *Profesionales en el estado español: situaciones objetivas y formas de organización*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1977.

- *Los trabajadores intelectuales y la estructura de clases*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982.
- FERNÁNDEZ STEINKO, Armando (eds.), *Sobre la democracia económica. La democracia en la empresa*, vol. II, 2001.
- (ed.), *Sobre la democracia económica. Los modelos organizativos y el papel del trabajo*, 2002, vol. III.
- *La clase obrera en España. Continuidades, transformaciones y cambios*, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo / Fundación de Investigaciones Marxistas, 2006.
- “La clase trabajadora veinticinco años después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas (1980-2005)” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *La clase trabajadora, después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, n° 26/27 (2008), pp. 183-204.
- *Trabajadores precarios. Trabajadores sin derechos. Los trabajadores españoles a comienzos del siglo XXI*, [Barcelona], Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo, 2009.
- “Conflictividad laboral y crisis”, *El Viejo Topo*, n° 278, (2011), pp. 50-57.

LAFFONT, Jean J. y TIROLE, Jean, *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*, Massachusetts, MIT Press / Cambridge, 1993.

LAFUENTE LECHUGA, Matilde, *Medidas de cuantificación de la desigualdad. La desigualdad de la renta según la E.P.F. 1990-91*, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 1994.

LAGALA, Canio (ed.), [DISPERSYN, Michel, FUCHS, Maximilian, GORELLI HERNÁNDEZ, Juan, KING, Sarah-Jane, LABORDE, Jean-Pierre], *Precariato e welfare in Europa: la tutela dei lavoratori precari in Belgio, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna*, Roma, Ediesse, 2007.

LAGARES CALVO, Manuel J., *Déficit público y crisis económica. Un análisis de la situación española*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982.

- (dir.), *Evaluación del fraude en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ejercicios 1979 a 1987. Tablas estadísticas*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1988.
- “Niveles de cobertura del gasto público en España”, *Papeles de Economía Española*, n° 37, (1988), pp. 150-173.
- CASTELLANO REAL, Francisco, “25 años del IRPF” en *Papeles de Economía Española*, vol. II, n° 100, (2004), pp. 2-16.

LAGO PEÑAS, Ignacio, *El voto estratégico en las elecciones generales en España (1977-2000): efectos y mecanismos casuales en la explicación del comportamiento electoral*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2005.

LAHERA FORTEZA, Jesús., *La carga de la prueba en el proceso de despido disciplinario*, Madrid, La Ley / Actualidad, 1996.

- “Factores jurídicos de la precariedad en España” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social*. Dossier monográfico *Sociedad y Utopía*. *Revista de Ciencias Sociales*, nº 29 (2007), pp. 205-220.

LAHERA SÁNCHEZ, Arturo, *Enriquecer el factor humano: paradigmas organizativos y trabajo en grupo*, Madrid, El Viejo Topo / Fundación de Investigaciones Marxistas, 2005.

LAÍN ENTRALGO, Pedro, *Las generaciones en la historia*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945.

LAIZ, Consuelo, *La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995.

LAMELAS GIL, Antonio, *La transición en Abril: biografía política de Fernando Abril Martorell*, Barcelona, Ariel, 2004.

LANCASTER, Thomas y PREVOST, Gary (eds.), *Politics and Change in Spain*, New York, Praeger, 1985.

- LEWIS-BECK, Michael S., “The Spanish voter: tradition, economics, ideology”, *Journal of Politics*, nº 48, (1986), pp. 648-674.

LANDES, David S., LINZ, Juan J., TILLY, Louise A. y TILLY, Charles [et a.], *Las dimensiones del pasado: Estudios de historia cuantitativa*, Madrid, Alianza, 1975.

LANDROVE, Gerardo, *La amnistía en España*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976.

LAPARRA, Miguel, *La construcción del empleo precario: dimensiones, causas y tendencias de la precariedad laboral*, Madrid, Cáritas / Fundación FOESSA, 2007.

LAQUEUR, Walter y MOSSE, George (eds.), *Generations in Conflict*. Dossier monográfico, *Journal of Contemporary History*, vol. V, nº 1, (1970).

LARA RODRÍGUEZ, Ángel Luis, “Una aproximación al ecosistema de la nueva fuerza de trabajo”, *Cuaderno de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XXI, nº 2, (2003), pp. 215-230.

LARAÑÁ, Enrique, “La juventud contemporánea y el conflicto intergeneracional”, *De juventud: revista de estudios e investigación*, nº 3, (1981), pp. 39-62.

- “Interpretación de los resultados electorales y predicciones políticas. Las elecciones autonómicas de Andalucía y Galicia (1982 y 1985)”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 50, (1986), pp. 285-309.

LASHERAS MERINO, Miguel Ángel, “La implantación del IVA en España: resultados y perspectivas”, *Papeles de Economía Española*, nº 30-31, (1987), pp. 265-271.

- RABALDÁN, Isabel y SALAS, Rafael, “Política redistributiva en el IRPF entre 1982 y 1990”, *Cuadernos de Actualidad de Hacienda Pública Española*, nº 7, (1993), pp. 165-172.

LAURÉ, Maurice, “Breve historia del nacimiento del IVA”, *Papeles de Economía Española*, nº 30-31, (1987), pp. 31-36.

LAVIANA, Juan Carlos (ed.), *El camino de la Libertad (1978-2008). La democracia año a año*, XXX vols., Madrid, Unidad Editorial, 2008.

LAVILLA, Landelino, *Sobre el régimen parlamentario: a los 30 años de vigencia de la Constitución (discurso de apertura leído el 27 de octubre de 2008)*, Madrid, Dykinson, 2008.

LAVOIE, Marc, *La Economía postkeynesiana: un antídoto del pensamiento único*, Barcelona, Icaria, 2005.

LAWSON, Nigel, ‘*The British Experiment*’. *The Fifth Mais Lecture*, London, City University Business School, 1984.

LAZO, Alfonso, “Socialdemocracia y socialismo: Una polémica inútil”, *Sistema*, nº 29-30, (1979), pp. 149-158.

LEADBEATER, David, "The consistency of Marx's categories of productive and unproductive labour", *History of Political Economy*, vol. XVII, nº 4, (1985), pp. 591-618.

LEAL, Jesús, "El «boom» inmobiliario madrileño: precios altos para rentas bajas", *Alfoz*, nº 46, (1987), pp. 23-84.

- (coord.), *Informe para una nueva política de vivienda*, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1992.

LEAL, Teresa y PÉREZ, Francisco J., "Análisis de las desviaciones presupuestarias aplicado al caso del presupuesto del Estado", *Documento de Trabajo del Banco de España*, nº 0933, (2010).

LEBOWITZ, Michael A., *Beyond capital: Marx's political economy of the working class*, London / New York, Praeger Macmillan, 1996

- *Más allá de "El Capital": la economía política de la clase obrera en Marx*, Madrid, Akal, 2005.

LECAILLON, Jacques, *Distribución de la renta y desarrollo económico. Estudio analítico*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987.

LEE, Sangheon, McCANN, Jon y MESSENGER, Jon C., *El tiempo de trabajo en el mundo: tendencias en horas de trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009.

LEGUINA, Joaquín, MUÑIZ, Miguel y SOLANA, Javier, "Un análisis socialista de las elecciones", *Zona Abierta*, nº 19, (1979) pp. 5-11.

- *El Chile de la Unidad Popular (1970-1973)*, Córdoba, Ateneo de Córdoba, 1999.

- *Defensa de la política*, Barcelona, Ediciones B, 1995

- *Conocer gente: recuerdos «casi» políticos*, Madrid, Aguilar, 2005.

LENIN, Vladimir, *El Estado y la revolución*, Madrid, Alianza, 2008 [1917].

LEONÉS SALIDO, José Manuel, "El abono del subsidio de incapacidad laboral transitoria tras el Real Decreto-Ley 5/1992 de 21 de julio", *La Ley*, nº4, (1993), pp. 1063-1065.

LETAMENDIA, Francisco, *Estructura política del mundo del trabajo: fordismo y posfordismo*, Madrid, Tecnos, 2009.

LETWIN, Shirley R., *The anatomy of Thatcherism*, London, Fontana, 1992.

LIEBERMAN, Sima, *Growth and Crisis in the Spanish Economy, 1940-93*, London, Routledge, 1995.

LILLO PÉREZ, Enrique, "Nuevos fines para la concertación social. El proyecto de reforma del INEM como ejemplo de un fracaso de modelo" en *Transformaciones del derecho del trabajo: nuevas formas de empleo y concertación social. Primeras jornadas interuniversitarias Barcelona-Toulouse. Barcelona, 2 y 3 marzo 1989*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1991, pp. 387-398.

LINARES RODRÍGUEZ, Virginia, "Riesgos laborales y jóvenes: análisis del tratamiento informativo en la prensa española", *Revista de Estudios de Juventud*, nº 79, (2007), pp. 159-175.

LINCOLN, James R. y KALLEBERG, Arne L., *Culture, Control and Commitment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

LINDBERCK, Assar y SNOWER, Dennis J., *The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment*, Cambridge / Massachusetts, MIT Press, 1988.

LINDE, Luis Mª, "La evolución de la peseta 1984-1994" en GARCÍA ATANCE, Salvador [et al.], *Historias de una década. Sistema financiero y economía española, 1984-1994*, Madrid, AB Asesores, pp. 111-136.

LINDEN, Marcel van der, "La «globalización» de la historia del trabajo y de la clase obrera y sus consecuencias" en SANZ, Vicent y PIQUERAS, José Antonio (eds.), *En el nombre del oficio. El trabajador especializado: corporativismo, adaptación y protesta*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.

- *Historia transnacional del trabajo*, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente UNED / Fundación Instituto de Historia Social, 2006.

- “Acumulación y fragmentación” en *¿Qué entendemos hoy por historia social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp. 163-170.
 - *Workers of the world: essays toward a global labor history*, Leiden / Boston, Brill, 2008.
- LINZ, Juan José y MONTERO, José Ramón (eds.), *Crisis y cambio: Electores y partidos en la España de los años ochenta*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986.
- *Crisis, breakdown and reequilibration*, Baltimore, The John Hopkins University, 1988, vol. I, *The breakdown and democratic regimes*.
 - “Legitimacy of Democracy and the Socioeconomic System” en DOGAN, M. (ed.), *Comparing Pluralist Democracies: Strains on Legitimacy*, Boulder, Westview Press, 1988, pp. 65-113.
 - “La transición a la democracia en España en perspectiva comparada” en COTARELO, Ramón (comp.), *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992, pp. 431-459.
- LISTER, Enrique, *Así destruyó Carrillo el PCE*, Barcelona, Planeta, 1983.
- LIZCANO, Pablo, *La Generación del 56: la Universidad contra Franco*, Barcelona, Grijalbo, 1981.
- LLÉS LAZO, Carlos, “Los estudios sobre la pobreza y exclusión social en la España de los 80: una visión sintética”, *Documentación Social*, nº 76, (1989), pp. 173-188.
- LLORDEN, Moisés (comp.), *De empresas y empresarios en la España contemporánea*, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1995.
- LLUCH, Ernest, “Recuperar el pasado, alcanzar Europa” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista: el ocaso de Felipe González*, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp. 35-49.
- *Últimos escritos*, Barcelona, Base, 2005.
- LOMANA, Gloria, *El ciclón socialista: 1982-1986, primera legislatura socialista*, Barcelona, Plaza & Janés, 1987.
- LÓPEZ, Isidro y RODRÍGUEZ, Emmanuel, *Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010)*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2010.
- LÓPEZ ARRIBA y GUERRI, Alberto Luis, *El Impuesto sobre el Valor Añadido*, Madrid, Edilex, 1986.
- LÓPEZ BAZO, Enrique, *Disparidades económicas y homogeneidad en el crecimiento regional: un enfoque basado en la población ocupada (1977-1992)*, Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, 1994.
- LÓPEZ BLASCO, Andreu y HERNÁNDEZ ARISTU, Jesús (comps.), *Jóvenes más allá del empleo: estructuras de apoyo a las transiciones*, Valencia, NAU Llibres, 2001.
- [et al.], *Indicadores sociales europeos básicos sobre juventud*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2001
 - *Informe 2008: Juventud en España. Jóvenes en una sociedad cambiante: demografía y transiciones a la vida adulta*, V vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 2009, vol. I.
- LÓPEZ CARBAJO, Juan Manuel, “La sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de mayo de 1994: validación constitucional de la Ley 20/1989, 28 de julio”, *Crónica tributaria*, nº 71, (1994), pp. 143-155.
- LÓPEZ i CASASNOVAS, Guillem, “El Informe «Abril» de reforma de la asistencia sanitaria”, *Papeles de Economía Española*, nº 48, (1991), pp. 99-105.
- GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel, “El gasto público: problemas actuales y perspectivas”, *Papeles de Economía Española*, nº 69, (1996), pp. 2-38.
- LÓPEZ CASERO, Francisco, BERNECKER, Walter L. y WALDMAN, Peter (comps.), *El precio de la modernización: formas y retos del cambio de valores en la España de hoy*, Madrid, Iberoamericana, 1994.
- LÓPEZ CALLE, Pablo, “Fin y progreso del trabajo” en *¿Qué es el empleo?* Dossier monográfico, *Política y Sociedad*, nº 34, (2000), pp. 131-154.

- CASTILLO, Juan José, *Los hijos de las Reformas Laborales. Trabajo, formación y vivienda de los jóvenes en la Comunidad de Madrid*. Madrid, UGT-Madrid, octubre de 2004.
- *La desmovilización general. Jóvenes, sindicatos y reorganización productiva*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007.
- LÓPEZ CUMBRE, Lourdes, *La prejubilación*, Madrid, Civitas, 1998; ESTEVE SEGARRA, M^a Amparo, *La jubilación forzosa*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999.
- LÓPEZ GALLEGOS, M^a Silva, “Trabajadoras sometidas: Retos y enfrentamientos laborales de las mujeres vallisoletanas durante el franquismo” en CABANA IGLESIA, Ana, LANERO TÁBOAS Daniel y SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor Manuel (eds.), *VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo [7º. 2009, Santiago de Compostela]*, Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo, 2010 [CD-ROM].
- LÓPEZ GANDÍA, Juan, “La permanente reivindicación de rebaja de cotizaciones y la financiación de la Seguridad Social”, *Revista de Derecho Social*, n° 45, (2009), pp. 233-240.
- LÓPEZ GARCÍA, Miguel Ángel, “El informe del Comité de Expertos sobre vivienda: una valoración tentativa”, *Documento de Trabajo. Fundación de las Cajas de Ahorros*, n° 85, (1992).
- LÓPEZ GARCÍA, Santiago y VALDALISO, Jesús M^a (eds.), *¿Qué inventen ellos? Tecnología, empresa y cambio económico en la España contemporánea*, Madrid, Alianza, 1997.
- LÓPEZ GETA, José M., “La contabilidad y el delito fiscal: responsabilidades personales”, *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, vol. IX, n° 38-39, (1982), pp. 371-386.
- LÓPEZ LIZ, José, *Los tipos de interés, una incógnita permanente: estudio práctico jurídico-económico de su evolución última*, Madrid, Marcial Pons, 1996.
- LÓPEZ LÓPEZ, Julia, “La contratación temporal y el fraude de ley”, *Relaciones Laborales*, vol. II, (1990), pp. 334-350.
- LÓPEZ LÓPEZ, M^a Teresa, “Ajustes de la imposición de la OCDE y de España ante la crisis”, *Papeles de Economía Española*, n° 24, (1985), pp. 154-180.
- y UTRILLA DE LA HOZ, Alfonso, “Una valoración de las políticas de gasto público en los Presupuestos Generales del Estado para 1993”, *Hacienda Pública Española*, n° 124, (1993), pp. 9-42.
- “Las prestaciones por desempleo en los países de la Unión Europea”, *Cuadernos Económicos de Deusto*, n° 11, (1994).
- LÓPEZ PINA, Antonio y ARANGUREN, Eduardo L., *La cultura política española. Del franquismo a la democracia*, Madrid, Taurus, 1976.
- “Sobre la ley electoral”, *Sistema*, n° 16, (1977), pp. 95-112
- BARNES, Samuel H. y Mc DONOUGH, Peter, *Bases sociales de la política económica y fiscal de España*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1986.
- (ed.), *La generación del 56*, Madrid, Marcial Pons, 2010.
- LÓPEZ PINTOR, Rafael, *Las bases sociales de la democracia en España*, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia [1981].
- *La opinión pública española del franquismo a la democracia*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982.
- JUSTEL, Manuel, “Iniciando el análisis de las elecciones generales de octubre de 1982”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 20, (1982), pp. 155-168.
- “El impacto del autoritarismo en la cultura política. La experiencia española en una perspectiva comparada” en CORTS GRAU, José [et al.], *Política y sociedad: estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol*, II vols., Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1987, vol. I, pp. 1063-1072.
- LÓPEZ RAIMUNDO, Gregorio, *Para la historia del PSUC: la salida a la superficie y la conquista de la democracia*, Barcelona, Península, 2006.

LORENTE, José Ramón “Negociación colectiva y empleo en España” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, vol. III, pp. 711-736.

- FRÍAS, José, “Las estadísticas salariales: metodología y análisis crítico”, *Información Comercial Española*, nº 580, (1981), pp. 87-98.

LORENZO CADARSO, Pedro L., *Fundamentos teóricos del conflicto social*, Madrid, Siglo XXI, 2001.

LORWIN, Val R. y PRICE, Jacob M. (eds.), *The dimensions of the past: materials, problems, and opportunities for quantitative work in history*, New Haven / London, Yale University Press, 1972.

LOZANO, Irene, *El saqueo de la imaginación*, Barcelona, Debate, 2008.

LOZANO, Diego, “Algunas consideraciones jurídicas sobre la prórroga del presupuesto de 1989”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 199-210.

LUCAS, Ángel de, *Actitudes y representaciones sociales de la población de la Comunidad de Madrid en relación con los censos de población y de vivienda de 1991*, Madrid, Conserjería de Economía, 1992.

LUENGO, Félix y MIRALLES, Ricardo (coords.), *Las élites en la España contemporánea*. Dossier monográfico *Historia Contemporánea*, nº 8 (1992).

LUIS MARTÍN, Francisco de, “«De estrella rutilante a secundario ilustre» o de la historiografía reciente sobre el socialismo en España” en FORCADELL, Carlos (ed.), *A los 125 años de la fundación del PSOE. Las primeras políticas y organizaciones socialistas*. Dossier monográfico, *Ayer*, nº 54, (2004), pp. 255-287.

LUJÁN ALCARAZ, José, *La acción sindical en la empresa: marco legal y desarrollo convencional*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2003.

LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010 [original en poder del autor].

- “Huelgas e intercambio político en España”, *Revista Internacional de Sociología*, (2012) [online].

LUZ MORÁN, Mª, “Un intento de análisis de la «clase parlamentaria» española: Elementos de renovación y de permanencia”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 45, (1989), pp. 61-84.

LYOTARD, Jean-François, *Le condition postmoderne: rapport sur le savoir*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.

- *La condición postmoderna: Informe sobre el saber*, Madrid, Cátedra, 1984.

MACHADO PAÍS, José, *Chollos, chapuzas, changas: jóvenes, trabajo precario y futuro*, Barcelona, Anthropos, 2007.

MAGADÁN DÍAZ, Marta y RIVAS GARCÍA, Jesús, *La Europa social*, Barcelona, Bosch, 1999.

MAINER, José Carlos y JULIÁ, Santos, *El aprendizaje de la libertad, 1973-1986: la cultura de la transición*, Madrid, Alianza, 2000.

MAIRA VIDAL, Mª del Mar, “El paternalismo industrial en el régimen franquista: la colonia industrial Ciudad Pegaso en Madrid”, *Sociología del Trabajo*, nº 65, (2009), pp. 137-162.

MAJONE, Giandomenico, “Paradoxes of Privatization and Deregulation”, *Journal of European Public Policy*, nº 1, (1994), pp. 53-69.

MALARET i GARC, Elisenda, *Régimen jurídico-administrativo de la reconversión industrial*, Madrid / Barcelona, Civitas / Escola d'Administració Pública, 1991.

MALDONADO JURADO, Juan A. y GONZÁLEZ AQUILERA, Silvia, “La desagregación de datos y la precisión en las estadísticas públicas: la Encuesta de Población Activa (E.P.A.)” en PASCUAL ACOSTA, Antonio, MARTÍNEZ ALMÉCIJA, Alfredo y MUÑOZ GARCÍA, Joaquín (eds.), *Tamaño de muestra y precisión estadística*, Almería, Universidad de Almería, 2004, pp. 269-286.

MALO DE MOLINA, José Luis, *Mercado de trabajo y estructura social: el caso español, 1963-1975*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Instituto de Estudios Laborales, 1984.

- “La medición de la productividad activa” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, vol. I, pp. 593-598.
 - (ed.), *El debate sobre la flexibilidad del mercado de trabajo*, Madrid, Fundación para la Investigación Económica y Social / Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1988.
 - “Política de empleo y reforma del mercado de trabajo” en id. (ed.), *El debate sobre la flexibilidad del Mercado de Trabajo*, Madrid, Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social, 1988, pp. 11-18.
 - PÉREZ FERNÁNDEZ, José, “La política monetaria española en la transición hacia la unión monetaria europea”, *Papeles de Economía Española*, nº 43, (1990), pp. 31-51.
 - TOHARIA, Luis, *Costes de despido y creación de empleo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999.
 - “Una visión macroeconómica de los veinticinco años de vigencia de la Constitución Española”, *Documento Ocasional. Banco de España*, nº 0307, (2003).
- MALUQUER, Jordi, “Consumo y precios” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2ª ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 1246-1296.
- LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2ª ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 1155-1245.
- MANCHA NAVARRO, Tomás, *Economía y votos en España: una aproximación al estudio de la interdependencia político-económica en España*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1993.
- MANDEL, Ernest, *El capitalismo tardío*, México, Era, 1982,
- *Las ondas largas del desarrollo capitalista*, Madrid, Siglo XXI, 1986.
- MANGAS MARTÍN, Araceli, “La II Conferencia de los Partidos Socialistas del Sur de Europa”, *Revista de Instituciones Europeas*, vol. IV, nº 3, (1977), pp. 882-883.
- MANNHEIM, Karl, “El problema de las generaciones”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 62, (1993) [1928], pp. 193-242.
- MANZANOS BILBAO, César, “Génesis de los conflictos, sociedad del miedo e industrialización del control”, *Documentación Social*, nº 161, (2011), pp. 15-42.
- MARAVALL, Fernando, *Economía y política industrial en España*, Madrid, Pirámide, 1987.
- MARAVALL, José Mª, *Dictadura y disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo*, Madrid, Alfaguara, 1978.
- “Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical”, *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 89-97.
 - “La alternativa socialista. La política y el apoyo electoral del PSOE”, *Sistema*, nº 35, (1980), pp. 3-48.
 - *La política de la transición*, Madrid, Taurus, 1982.
 - *El desarrollo de la reforma universitaria. Discurso pronunciado en el Pleno del Consejo de Universidades, Santander, septiembre de 1986*, Madrid, MEC Centro de Publicaciones, 1986.
 - *La reforma de la enseñanza*, Barcelona, Laia, 1987.
 - “Las razones del reformismo: Democracia y política social”, *Leviatán*, nº 35, (1989), pp. 27-50.
 - [et al.], *Socialist parties in Europe*, II vols., Barcelona, Institut d'Edicions de la Diputació, 1991, vol. I

- “From opposition to government: the politics and policies of the PSOE” en id. [et al.], *Socialist parties in Europe*, II vols., Barcelona, Institut d’Edicions de la Diputació, 1991, vol. I, pp. 5-34.
 - “Democracia y socialdemocracia. Quince años de política en España”, *Sistema*, nº 100, (1991), pp. 41-67.
 - “What is Left? Social Democratic policies in Southern Europe”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 36, (1992).
 - “Politics and Policy: Economic Reforms in Southern Europe” en PEREIRA, Luis Carlos, id. y PRZEWORKSKI, Adam, *Economic Reforms in New Democracies. A social-Democratic Approach*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 77-131.
 - *Los resultados de la democracia: un estudio del sur y del este de Europa*, Madrid, Alianza, 1995.
 - (ed.), *Dimensiones de la desigualdad: III simposio sobre igualdad y distribución de la renta y la riqueza*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1999, vol. I.
 - *El control de los políticos*, Madrid, Taurus, 2003.
 - “Las estrategias de crispación bajo Felipe González y Zapatero”, *Claves de Razón Práctica*, nº 184, (2008), pp. 8-21.
 - *La confrontación política*, Madrid, Taurus, 2008
- MARCO ALEDO, Mariluz, “El conflicto laboral en España durante el periodo, 1986-1994”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 21, (2000), pp. 209-234.
- TAMBORERO SANJUÁN, Pilar, “Las formas de finalización de las huelgas: análisis de la intervención de terceros en el conflicto en España”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 31, (2001), pp. 115-134.
- MARCOS GARCÍA, Carmen (dir.), *El papel de los registros administrativos en análisis social y económico y el desarrollo del sistema estadístico*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2006.
- MARCZEWSKI, Jean, *Introduction à l’histoire quantitative*, Genève, Droz, 1965.
- MARÍ-KLOSE, Pau y MARÍ-KLOSE, Marga, *Edad de cambio: jóvenes en los circuitos de solidaridad intergeneracional*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2006.
- MARÍAS, Julián, *El método histórico de las generaciones*, 4ª ed., Madrid, Revista de Occidente, 1967 [1949].
- MARIMON, Ramón (ed.), *La economía española: una visión diferente*, Barcelona, A. Bosch-CREI, 1996.
- MARIMON, Ramón y ZILIBOTTI, Fabrizio, “Employment and Distributional Effects of Restricting Working”, *Economics Working Papers. European University Institute*, nº 19, (1999), y elaboración propia.
- MARÍN ARCAS, José, “El proceso de consolidación fiscal en Europa. Consecuencias para los antiguos y los nuevos socios”, *Papeles de Economía Española*, nº 103, (2005), pp. 245-259.
- MARÍN ARCE, José Mª, “La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS): una experiencia de unidad de acción sindical durante la transición”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Hª Contemporánea*, nº 9, (1996), pp. 295-314.
- *Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición, 1976-1982*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1997.
 - “Diez años de gobierno del PSOE (1982-1992)”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, nº 13, (2000), pp. 189-209.
 - MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere, *Historia política, 1939-2000*, Madrid, Istmo, 2001.
 - “La democracia consolidada, 1982-2000” en id., MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere, *Historia política, 1939-2000*, Madrid, Istmo, 2001, pp. 321-480.

- “La fase dura de la reconversión industrial: 1983-1986” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura socialista, 1982-1986*. Dossier monográfico *Historia del Presente*, nº 8, (2006), pp. 61-101.
- “Condicionantes económicos y sociales de la transición” en MOLINERO, Carme (ed.), *La Transición, treinta años después*, Barcelona, Península, 2006, pp. 85-99.
- “Los socialistas en el poder (1982-1996)” en PÉREZ LEDESMA, Manuel (ed.), *Las izquierdas en la España democrática*. Dossier monográfico, *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, nº 20, (2008), pp. 43-71.

MARTÍN ARTELES, Antonio y ALÓS-MONER, Ramón, “Estrategias de Flexibilidad y Condiciones de Trabajo en España”, *Documento de Trabajo. Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo*, (2000) [original en poder del autor].

MARÍN GELABERT, Miquel Àngel, *Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-1975. La historia local al servicio de la patria*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» / Presas Universitarias de Zaragoza, 2004.

- “La historia de la historiografía en España: recepción y crisis de una disciplina, 1976-2007” en ORTEGA LÓPEZ, Teresa Mª (coord.), *Por una historia global: el debate historiográfico en los últimos tiempos*, Granada, Universidad de Granada / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 319-437.

MARÍN GÓMEZ, Isabel, *Asociacionismo, sociabilidad y movimientos sociales en el franquismo y la transición a la democracia: Murcia, 1964-1986*, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2007.

MARKS, Peter, *The Making of Spanish European Policy*, London, Gower, 1994.

MAROTO SÁNCHEZ, Andrés y CUADRARO ROURA, Juan Ramón, *La productividad en la economía española*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2006.

MARQUÉS PERALES, Ildefonso y HERRERA-USAGRE, Manuel, “¿Somos más móviles? Nuevas evidencias sobre la movilidad intergeneracional de clase en España en la segunda mitad del siglo XX?”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 131, (2010), pp. 43-73.

MÁRQUEZ, Fabián, “Antecedentes del ET, El Acuerdo Básico Interconfederal. El «abuelo» de los acuerdos y el Estatuto de los Trabajadores” SARACÍBAR, Antón [et al.], *25 años del Estatuto de los Trabajadores (1980-2005)*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2005, pp. 108-125.

MÁRQUEZ PRIETO, Antonio, *La protección por desempleo en España y en otros estados europeos*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001.

MAS, Matilde y QUESADA, Javier (dirs.), *Las nuevas tecnologías y el crecimiento económico en España*, Bilbao, Fundación BBVA, 2005.

MAS HERNÁNDEZ, Rafael y RODRÍGUEZ CHUMILLAS, Isabel, “El mercado inmobiliario en España”, *Mediterráneo Económico*, nº 3, (2003), pp. 170-198.

MASSANA, Eva, “Imagen del INEM en los empresarios y perfil del personal contratable” en COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID (ed.), *Psicología, trabajo, organización y nuevas formas de empleo: 1º Congreso Iberoamericano y 3º Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones: Madrid, 23-26 marzo 1988*, II vols., Madrid, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 1988, vol. I, *Libro de simposios*.

MARSI, Luca, “El pensamiento «economicista», base ideológica del modelo neoliberal”, *Historia Actual Online*, nº 14, (2007), pp. 175-190.

MARTÍ, Casimir, *Orígenes del anarquismo español*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1959.

- “Panorama de los estudios monográficos recientes sobre el movimiento obrero español” en TUÑÓN DE LARA, Manuel y BOTREL, Jean François (dirs.), *Movimiento obrero, política y literatura en la España Contemporánea [Coloquio del Seminario de Estudios de los siglos XIX y XX (4º. 1973. Pau, Gerona)]*, Madrid, Edicusa, 1974, pp. 27-52.

MARTÍ SEMPERE, Mónica, *El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992): estimación de sus efectos sobre la probabilidad de transición desde el paro a la ocupación*, Alicante, Universidad de Alicante, 1998.

MARTÍN, Ricardo, *Almunia: un corredor de fondo*, Madrid, Temas de Hoy, 1998.

MARTÍN ACEÑA, Pablo [et al.], *Empresa pública e industrialización en España*, Madrid, Alianza Editorial, 1990.

- COMÍN, Francisco, *INI: 50 años de industrialización en España*, Madrid, Espasa Calpe, 1991.
- MORENO, Begoña, “Miguel Boyer Salvador” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en sus ministros. Franquismo y democracia*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, pp. 205-227.
- “Los estudios de macroeconomía en España: Las enseñanzas del profesor Rojo” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas españoles*, IX vol., Barcelona, Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 1999, vol. VII, *La consolidación académica de la economía*, pp. 525-550.
- *El Servicio de Estudios del Banco de España (1930-2000)*, Madrid, Banco de España, 2000.
- PONS, M^a Ángeles, “Sistema monetario y financiero” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2^a ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 647-706.

MARTÍN ARTILÉS, Antonio, *Flexibilidad y relaciones laborales. Estrategias empresariales y acción sindical*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1995.

- JÓDAR, Pere y ALÓS-MONER, Ramón de, “El sindicato hacia dentro: la relación entre la organización y los trabajadores desde el análisis de la afiliación” en *Visions alternatives sobre la societat i la realitat social*. Dossier monográfico, *Papers*, n° 72, (2004), pp. 113-144.

MARTÍN CASTRO, M^a Belén, “Políticas de Juventud en España: Aspectos institucionales y competenciales en un Gobierno multinivel”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, n° 25 (2000), pp. 111-138.

MARTÍN CORREA, José M^a, “La duración del contrato (En torno al artículo 15)”, *Revista española de Derecho del Trabajo* n° 100, (2000), pp. 480-495

MARTÍN CRIADO, Enrique, *Estrategias de juventud: Jóvenes, estudios, trabajos, clases sociales*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1993.

- “Economías morales de las relaciones laborales en grupos de trabajadores jóvenes”, *Economía y Sociología del Trabajo*, n° 29-30, (1995), 143-151.
- “Los empleos y los paros de los jóvenes”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, n° 11, (1997), pp. 174-201.
- *Producir la juventud. Crítica de la sociología de la juventud*, Madrid, Istmo, 1998.
- “Juventud” en REYES, Román (ed.) y MUÑOZ, Juan (coord.), *Diccionario crítico de Ciencias Sociales*, IV vols., Madrid, Plaza y Valdés, 2009, vol. IV, pp. 1630-1635.

MARTÍN GONZÁLEZ, Carmela, “La convergencia real en Europa: un referente clave para la política económica española”, *Papeles de Economía Española*, n° 63, (1995), pp. 2-17.

- “La situación tecnológica: cambio técnico y política tecnológica” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 355-378.

MARTÍN GONZÁLEZ, Germán, *Introducción a la estadística*, 2^a ed., Valencia, Universidad Católica de Valencia ‘San Vicente Mártir’, 2009.

MARTÍN LÓPEZ, Enrique (ed.), “Seguridad Social, Sanidad y Servicios Sociales en España (1975-1983)” en MURILLO FERROL, Francisco (dir.), *Informe sociológico sobre el cambio social en España 1975/1983: IV informe FOESSA*, Madrid, Euramérica, 1981, II vol., pp. 827-916.

MARTÍN NÁJERA, Aurelio, (dir.), *Catálogo de los archivos de Guerra Civil de las comisiones ejecutivas del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1988.

- GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio, *Fuentes para la historia de la Unión General de Trabajadores*, Madrid, Pablo Iglesias, 1988.
- *Guía para la consulta del fondo documental de la Fundación Pablo Iglesias: archivo, biblioteca y hemeroteca*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1989.
- *Fuentes para la historia del Partido Socialista Obrero Español y de las Juventud Socialistas de España*, II vols., Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1991.
- *Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2009.
- (dir.), *Diccionario biográfico del socialismo español (1879-1939)*, II vols., Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2010.

MARTÍN NAVARRO, José Luis, RUESGA BENITO, Santos M. ORTIZ, Laura P. y RESA NESTARES, Carlos, “Análisis económico de la negociación colectiva”, *Temas Laborales*, nº 76, (2004), pp. 287-318.

MARTÍN ROMÁN, Ángel, “Ley de Okun, paro registrado y paro EPA”, *Boletín económico de ICE*, nº 2728, (2002), pp. 11-16

- “Estimación de la evolución de un índice de los «verdaderos» riesgos laborales no sesgado por la composición ocupación: una aplicación para las regiones españolas”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 71, (2008), pp. 169-195.

MARTÍN de SANTA OLALLA SALUDES, Pablo, “Izquierda y aconfesionalidad. Las relaciones entre la Iglesia y el primer gobierno socialista” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura socialista, 1982-1986. Dossier monográfico Historia del Presente*, nº 8, (2006), pp. 121-139.

MARTÍN SECO, Juan Francisco, “Comentarios sobre la economía española”, *Leviatán*, nº 32, (1988), pp. 39-50.

- “Sector público: ingresos, gastos y financiación” en ALBARRACÍN, Jesús, (ed.), *Reflexiones sobre política económica*, Madrid, Editorial Popular, 1990, pp. 161-214.
- *¿La economía, estúpidos, la economía! La política económica del social-liberalismo*, Madrid, Libertarias, Prodhufo, 1993.
- “Quiebra del modelo económico español” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los ochenta*, Madrid / Barcelona, Icaria / Instituto Sindical de Estudios, 1993, pp. 133-162.
- *La pinza: dos partidos distintos y una sola política económica verdadera*, Barcelona, El Viejo Topo, 1997.
- *¿Para qué servimos los economistas?* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2010.
- *La trastienda de la crisis. Lo que el poder económico quiere ocultar*, Barcelona, Península, 2010.

MARTÍN SERRANO, Manuel (dir.), *Historia del cambio de mentalidades de los jóvenes entre 1960-1990*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1994.

- VELARDE HERMIDA, Olivia, *Informe de la Juventud 1996*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1997.
- y id., *Informe juventud en España 2000*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2001.

MARTÍN VALVERDE, Antonio, “La política de Empleo: caracterización general y relaciones con el Derecho del Trabajo”, *Documentación laboral*, nº 9, (1983), pp. 61-80.

- “Las transformaciones del derecho del trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de Reforma del Estatuto de los Trabajadores” en RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel (coord.), *Comentarios a la nueva legislación laboral. Ley reformada del Estatuto de los Trabajadores, Ley de Protección por Desempleo y Decretos de desarrollo*, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 17-44.
- “Estructura y proceso de la negociación colectiva”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 18, (1992), pp. 19-26.

MARTÍN VILLA, Rodolfo, *Al servicio del Estado*, Barcelona, Planeta, 1984.

MARTÍNEZ-ABASCAL, Eduardo, “Comportamiento de los tipos de interés en España: 1987-95”, *Análisis financiero*, nº 70, (1996), pp. 86-97.

MARTÍNEZ-ALIER, Joan, “El Pacto de la Moncloa: la lucha sindical y el nuevo corporativismo”, *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, nº 59/60, (1977), pp. 32-51.

- ROCA, Jordi, “Economía política del corporativismo en el Estado español: del franquismo al posfranquismo”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 41, (1988), pp. 25-62.

MARTÍNEZ AREVALO, Luis, “El Sistema Monetario Europeo: una visión de política económica”, *Información Comercial Española*, nº 657, (1988), pp. 56-62.

MARTÍNEZ AZUAR, Juan Antonio y MARTÍNEZ SERRANO, Alicia, “Las cotizaciones a la Seguridad Social en los países de la Unión Europea”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 34, (2002), pp. 169-172.

MARTÍNEZ BRETON, M^a Jesús y MARTÍNEZ DORESTE, M^a del Pino, *Financiación del déficit público en España y nuevos mercados financieros*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1992.

MARTÍNEZ CASTELLS, Àngels, DIGÓN, Raül y JUBERÍAS, Luis (eds.), *Ciudadanía i participació política*, Barcelona, Fundació Pere Ardiaca, 2005.

MARTÍNEZ COBO, Carlos y MARTÍNEZ COBO, José (coord. / recopil.), *Congresos del PSOE en el exilio*, II vols., Madrid, Pablo Iglesias, 1981.

- *La primera renovación*, vol. I. (1989); *¿República? ¿Monarquía? En busca del consenso (1946-1954)*, vol. II, (1991); *La travesía del desierto (1954-1970)*, vol. III (1995), *La segunda renovación*, vol. IV (1991) [Barcelona, Plaza & Janés].

MARTÍNEZ de PABLO, Francisco J., “La banca, de los setenta al mercado único” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 349-370.

MARTÍNEZ EMPERADOR, Rafael, *Estabilidad en el empleo y contratación temporal*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1985.

- “El contrato temporal por lanzamiento de nueva actividad”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1985), pp. 121-125.

MARTÍNEZ FENOLL, José Salvador, *El tiempo de trabajo: jornada, horas extraordinarias, trabajo nocturno*, Valencia, CISS, 1996.

MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso (coord.), *La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969*, Córdoba, Fundación de Estudios Sindicales de CCOO de Andalucía / El Páramo, 2011.

MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel, *Delitos e infracciones tributarias: teoría y práctica*, Valladolid, Lex Nova, 1991.

- “Valoración de las medidas de amnistía fiscal de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, nº 24, (1992), pp. 227-252.

MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel, “El Movimiento de Okupaciones: contracultura urbana y dinámicas alter-globalización”, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 77, (2007), pp. 201-223.

MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España siglo XX (1939-1996)*, Madrid, Cátedra, 1999.

- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, SOUTO KUSTRÍN, Sandra y BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés (coords.), *El valor de la historia: homenaje al profesor Julio Aróstegui*, Madrid, Editorial Complutense, 2009, pp. 331-346.

MARTÍNEZ MÉNDEZ, Pedro, *Los beneficios de la Banca*, Madrid, Banco de España, 1991.

- “Fiscalidad, tipo de interés y tipo de cambio”, *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 9116, (1993).

MARTÍNEZ NOVAL, Luis, “Los sindicatos en la Europa de los noventa”, *Economía y sociología del trabajo*, nº 10, (1990), pp. 8-15.

- “La Europa social después de Maastricht”, *Leviatán*, nº 46, (1991), pp. 21-30.
- “La distribución personal de la renta en España (Una contrastación de la alternativa eficiencia-equidad)” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del cambio: diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992, pp. 195-227.
- “Evolución y financiación del Estado del Bienestar” en FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás y GARCÉS FERRER, Jorge (coords.), *Crítica y futuro del Estado del Bienestar: reflexiones desde la izquierda*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 293-318.

MARTÍNEZ PUJANA, Ana, “Reflexiones sobre una alternativa socialista a la economía española” en PSOE. EQUIPO JAIME VERA, *La alternativa socialista del PSOE (algunas contribuciones)*, Madrid, Cuadernos para el dialogo, 1977, pp. 251-270.

MARTÍNEZ QUINTANA, Mª Violante, *Mujer, trabajo, maternidad: problemas y alternativas de las madres que trabajan*, Madrid, Instituto de la Mujer, 1992.

MARTÍNEZ QUINTERIO, Esther, *La denuncia del sindicato vertical*, II vols., Madrid, Consejo Económico y Social, 1997, vol. II, 2ª parte, *El debate internacional sobre la violación del derecho de la libertad sindical en el tardofranquismo*.

MARTÍNEZ REVERTE, Jorge, *Nicolás Redondo: memoria política*, Madrid, Temas de Hoy, 2008.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Antonia (ed.), *El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimiento*, Madrid, Tecnos, 2000.

MARTÍNEZ ROMERO, Mª Francisca, *Diez años de la economía andaluza (1977-1987): una historia cuantitativa*, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1997.

MARTÍNEZ SERRANO, José Antonio, “Fluctuaciones, desequilibrios y políticas macroeconómicas” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 683-710.

MARTÍNEZ SOLER, José Antonio, *Los empresarios ante la crisis económica*, Barcelona, Grijalbo, 1983.

MARTÍNEZ TEN, Carmen, GONZÁLEZ RUIZ, Pilar y GUTIÉRREZ LÓPEZ, Purificación (eds.), *El movimiento feminista en España en los años 70*, Madrid, Cátedra, 2009.

MARTYKÁNOVÁ, Darina, “Las personas de su tiempo o la historia de las mentalidades” en ORTEGA LÓPEZ, Teresa Mª (coord.), *Por una historia global: el debate historiográfico en los últimos tiempos*, Granada, Universidad de Granada / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 167-189.

MARUANI, Margaret, “De la Sociología del Trabajo a la Sociología del empleo” *¿Qué es el empleo?* Dossier monográfico, *Política y Sociedad*, nº 34, (2000), pp. 9-17.

- ROGERAT, Chantal y TURNS, Teresa (coords.), *Las nuevas fronteras de la desigualdad: hombres y mujeres en el mercado de trabajo*, Barcelona, Icaria, 2000.
- *Trabajo y el empleo de las mujeres*, Madrid, Fundamentos, 2002.

MARX, Karl y ENGELS, Friedrich, *La ideología alemana*, 5ª ed., Barcelona, Grijalbo, 1972 [1845/1846].

- *El 18 de Brumario de Luis Bonaparte*, Madrid, Fundación Federico Engels, 2003 [1855].
- *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Borrador 1857-1858*, 13ª ed., México, Siglo XXI, 1984.
- *El capital: Crítica de la economía política*, III vols., Buenos Aires, Siglo XXI, 2004 [1867], vol. I, *El proceso de producción del capital*.

MASSARAT, M., *Crisis de la energía o crisis del capitalismo*, Barcelona, Fontamara, 1979.

MATÉ RUBIO, José Mª, “La productividad del trabajo en España y en la UE: Análisis comparado del conjunto de la economía y de la industria manufacturera”, *Papeles de Economía Española*, nº 63, (1995), pp. 112-125.

MATEOS, Abdón, “Comunistas, socialistas y sindicalistas ante las elecciones del sindicato vertical 1944-1967”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, nº 1, (1988), pp. 379-412.

- “Del blindaje de la sotana al sindicalismo aconfesional (USO en la oposición al régimen de Franco: 1960-75)”, *El Proyecto*, nº 8, (1989), pp. 43-48.
- *El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español (1953-1974)*, Madrid, Pablo Iglesias, 1993.
- “Los orígenes de la Unión Sindical Obrera: Obrerismo juvenil cristiano, cultura sindicalista y proyecto socialista”, *XX Siglos*, nº 22, (1994), pp. 107-118.
- *La denuncia del sindicato vertical*, II vols., Madrid, Consejo Económico y Social, 1997, vol. II, 1ª parte, *La era de Solís: el nacional-catolicismo ante la Organización Internacional del Trabajo*.
- “El PSOE durante la dictadura franquista” en TEZANOS, José Félix (coord.), *PSOE 125: 125 años del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2004, pp. 92-125.
- HERRERÍN, Ángel (eds.), *La España del presente: de la dictadura a la democracia*, Madrid, UNED, 2006.
- *Historia de la UGT: contra la dictadura franquista, 1939-1975*, Madrid, Siglo XXI, 2008, vol. V.

MATEOS, Araceli y MORAL, Félix, *El comportamiento electoral de los jóvenes españoles en las elecciones generales*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2001

- *El cambio en las actitudes y los valores de los jóvenes*, Madrid, INJUVE, 2002.

MATEOS BEATO, Alfredo y MARTÍN JIMÉNEZ, Rodrigo, *Conceptos y temas prácticos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Navarra, Aranzadi Thomson Reuters, 2010.

MATHIEU BREGLIA, Gladys, *La investigación sobre la relación de los jóvenes con la política en los Estudios de Juventud de España (1990-2004)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2007.

MARCOS DOMÍNGUEZ, Pilar y FERNÁNDEZ MÉNDEZ de ANDRÉS, Fernando, “Notas explicativas sobre la realización de la EPA” *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 26-34.

MAYO MORENO, Rafaela, “Análisis redistributivo del IVA: Incidencia de los tipos impositivos”, *Hacienda Pública Española*, nº 132, (1995), pp. 153-189.

MAYORDOMO GINES, Maribel y CARRASCO, Cristina, “Los modelos y estadísticas de empleo como construcción social: la Encuesta de Población Activa y el sesgo de género”, *Política y Sociedad*, nº 34, (2004), pp. 101-112.

McCLOSKEY, D. N., “The Achievements of the Cliometric School”, *Journal of Economic History*, vol. XXXVIII, nº 1, (1978), pp. 13-28.

MCDONELL, Lawrence T., “«Sois demasiados sentimentales»: Problemas y sugerencias para una nueva historia del trabajo”, *Historia Social*, nº 10, (1997), pp. 71-100.

MCDONOUGH, Peter, BARNES, Samuel y LÓPEZ PINA, Antonio, *The cultural dynamics of democratization in Spain*, New York / London, Cornell University Press, 1998.

McRAE, Susan, *El trabajo a tiempo parcial en la Unión Europea: dimensión en función del sexo*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1996.

MEAD, Margaret, *Cultura y compromiso. Estudios sobre la ruptura intergeneracional*, Buenos Aires, Granica, 1971.

MEDINA GONZÁLEZ, Manuel, *Prejubilación ¿premio o pesadilla? Guía práctica de prejubilación, jubilación anticipada y jubilación*, Jaén, El Olivo, 2001.

MEES, Ludger, “¿Vino viejo en odres nuevos? Continuidades y discontinuidades en la historia de los movimientos sociales”, *Historia Contemporánea*, nº 16, (1997), pp. 219-254.

MEGÍAS, Eusebio, *Comunicación y conflictos entre hijos y padres*, Madrid, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2003.

- (coord.), *Jóvenes y política: el compromiso de lo colectivo*, Madrid, Instituto de la Juventud / Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2005.

MEJORADO HOYOS, Ascensión, *Los determinantes micro y macroeconómicos del déficit comercial en España: 1954-1994*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1996.

MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, Lourdes, “Los sujetos responsables en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social”, *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, nº 78, (2008), pp. 93-120.

MELGUIZO SÁNCHEZ, Ángel, *La incidencia económica de las cotizaciones sociales en España*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006.

- “¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la fiscalidad laboral?: una panorámica de la literatura empírica”, *Hacienda Pública Española*, nº 188, (2009), pp. 125-182.

MELIÀ, Josep, *Marcelino Camacho. Perfil humano y político*, Madrid, Cambio 16, 1977.

- *Así cayó Adolfo Suárez*, Barcelona, Planeta, 1981.

MELLE HERNÁNDEZ, Mónica, “Algunos resultados efectivos de las privatizaciones en España: una primera aproximación”, *Economía Industrial*, nº 330, (1999), pp. 140-158.

MELLÓN, Joan Antón (ed.), *Ideologías y movimientos políticos contemporáneos*, Madrid, Tecnos, 1988

MÉNDEZ, Idelfonso, “El gasto público en bienestar social y los modelos de bienestar”, *Documento de Investigación ESYEC*, nº 13, (2010).

MÉNDEZ LAGO, Mónica, *La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (1975-1996)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI, 2000.

MÉNY, Yves, MULLER, Pierre y QUERMONE, Jean-Louis (eds.), *Adjusting to Europe. The impact of the European Union on national institutions and policies*, London, Macmillan, 1996.

MERCADER UGUINA, Jesús R., *Estructura de la negociación colectiva y relaciones entre convenios*, Madrid, Civitas / Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1994.

- *La contratación temporal en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999.
- (dir.), *El contenido económico de la negociación colectiva*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.

MERINO, Rafael y GARCÍA, Maribel, “Pasado y futuro del estudio sobre la transición de los jóvenes”, *Papers*, vol. XCVI, nº 4, (2011), pp. 1139-1162.

MERINO, Raquel (dir.), *Una sociedad de propietarios. El camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera*, Madrid, Instituto Juan de Mariana, 2006.

MERKEL, Wolfgang, *¿Final de la socialdemocracia? Recursos de poder y política de gobierno de los partidos socialdemócratas en Europa occidental*, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1995.

MICHAEL, Donald N., *La próxima generación: las perspectivas de la juventud de hoy y mañana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1974.

MICHALSKI, Wolfgang, *Politique d'Ajustement Positif: Maitriser le changement structurel*, Paris, OECD, 1979.

- “Claves para el cambio estructural y una recuperación prolongada”, *Papeles de Economía Española*, nº 17, (1983), pp. 12-24.

MICHELS, Robert, *Political Parties*, New York, Free Press, 1963.

- *Los partidos políticos*, Buenos Aires, Amorrortu, 1969.

MICHON, François, “El tiempo de trabajo en los países industrializados: convergencias y divergencias”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 15-16, (1992), pp. 105-117.

MIGUEL, Amando de (dir.), *Dos generaciones de jóvenes (1960-1998)*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2000.

MIGUEL, Jesús M. de, *Estructura y cambio social en España*, Madrid, Alianza, 1998.

MIGUEL, Iñaki y MIGUEL, Amando de, *Los españoles y los impuestos*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001.

MIGUEL CASTAÑO, Carmen, “La medición estadística del empleo y del paro”, *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 2-25.

MIGUEL GONZÁLEZ, Román, *La pasión revolucionaria. Culturas políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo XIX*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

MIGUÉLEZ, Faustino, *SEAT la empresa modelo del régimen*, Barcelona, Dopesa, 1977.

- “Corporativismo y relaciones laborales en Europa”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 30, (1985), pp. 149-178.
- “Sindicalismo y conflicto social en la España de la transición”, *Mientras Tanto*, nº 24, (1985), pp. 19-44.
- “Nuevas tecnologías, clase trabajadora y contrato social” en BAYLOS, Antonio, [et al.], *Nuevas tecnologías y clase obrera*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1989, pp. 141-148.
- PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones de empleo en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999.

MILANOVIC, Branko, “True World Income Distribution, 1988 and 1993: First calculation base on Household surveys alone”, *Policy Research Working Paper*, nº 2244, (1999).

MILANOVIC, Branko, “Nuevo cálculo de la desigualdad global: consecuencias de las nuevas estimaciones de la paridad del poder adquisitivo (PPA)”, *Sistema*, nº 217, (2010), pp. 3-17.

MILIBAND, Ralph, PANITCH, Leo y SAVILLE, John (eds.), *El neoconservadurismo en Gran Bretaña y Estados Unidos: retórica y realidad*, Valencia, Alfons el Magnànim, 1992.

MILNE, Seumas, *The enemy within: Thatcher's Secret war against the Miners*, London, Verso, 2004.

MILLÁN, Jesús, “Los sujetos históricos: modelos, tipos ideales y estrategias de investigación”, en ROMERO, M^a Cruz y SAZ, Ismael (eds.), *El siglo XX. Historiografía e historia [5^o, Valencia, 2000]*, Valencia, Universitat de València, 2002, pp. 101-110.

MILLET, Montserrat, “Las relaciones de España y el Grupo Mundial”, *Economistas*, vol. XIX, nº 90, (2001), pp. 27-33.

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, *Solidaridad e igualdad de oportunidades: una política social integrada*, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1989.

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO, “Grado de cumplimiento de los criterios de convergencia (primer semestre de 1994)”, *Boletín Económico de ICE*, nº 2421, (1994), pp. 1947-1951.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, *Programa a medio plazo para la economía española*, Madrid, Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía, 1979.

- *Aspectos básicos de la política económica en 1979*, Madrid, Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía, 1979.
- DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN Y COYUNTURA, *La economía española en 1979*, Madrid, Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía, 1979.
- DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN Y COYUNTURA, *La economía española en 1980 y las perspectivas a corto plazo*, Madrid, Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía y Comercio / 1981.
- DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN Y COYUNTURA, *La mejora de la productividad: un objetivo nacional*, Madrid, Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía, 1981.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMERCIO, *Crisis y reforma de la economía española, 1979/82*, Madrid, Ministerio de Economía y Comercio / Secretaría General Técnica, 1982.

- *Crisis y reforma de la economía española, 1979/82*, Madrid, Ministerio de Economía y Comercio / Secretaría General Técnica, 1982
- *Análisis de las estadísticas del mercado de trabajo (1976-1980)*, Madrid, Ministerio de Economía y Comercio / Secretaría General Técnica, 1982.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, *Informe económico-financiero: Presupuestos 1983*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1983.

- *Informe económico-financiero: Presupuestos 1984*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1983.
- *Informe económico-financiero: Presupuestos 1985: formulado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley General Presupuestaria*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1984.
- *Escenario macroeconómico y presupuestario, 1989-1992*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1988.
- *Informe sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1989.
- *Informe económico-financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 1990: aprobados por la Ley 4/1990 de 29 de junio*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1990.
- *Informe económico-financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 1991*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1991.
- *Programa de convergencia: Madrid, marzo de 1992*, Madrid, [s/d.], 1992.
- *La descentralización del gasto Público en España. Periodo 1984-1993*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, 1993.
- *Actualización del Programa de convergencia*, Madrid, [s/d.], 1994.
- *Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006 para las Regiones Españolas del Objetivo 1)*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / FEDER, 2001.
- DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA, *Un año de IVA: su implantación en España*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Gestión Tributaria, 1987.
- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA, *La negociación colectiva en las grandes empresas: principales características económicas*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Política Económica, 1991.
- DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN Y COYUNTURA, *Balance y perspectivas de la economía española: informe económico y financiero del Proyecto de Presupuestos Generales de 1986*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Previsión y Coyuntura, 1985.
- DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN Y COYUNTURA, *Balance y perspectivas de la economía española: informe económico y financiero del Proyecto de Presupuestos Generales de 1987*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Dirección General de Previsión y Coyuntura, 1986.
- SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN. *Programa económico a medio plazo, 1984-87*, III vols., Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General de Economía y Planificación, 1984/1985, vol. I, *Evolución general y proyecciones de la economía española*; vol. II, *Reformas estructurales e institucionales*; vol. III, *Políticas sectoriales*; id. *Programa económico a medio plazo, 1985-88*, II vols., Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General de Economía y Planificación, 1985, vol. I, *Proyecciones de la economía española*; vol. II, *Reformas estructurales e institucionales*.

Balance de 1984 y perspectivas; y finalmente, id. *Programa económico a medio plazo, 1986-1990*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General de Economía y Planificación, 1986.

- SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, *Programa económico a medio plazo, 1984-87*, III vols., Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1984/1985, vol. I, *Evolución general y proyecciones de la economía española*; vol. II, *Reformas estructurales e institucionales*; vol. III, *Políticas sectoriales*.
- SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, *Programa económico a medio plazo: documentos I y II*, Madrid, Secretaría General de Economía y Planificación [1984].
- SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, *Programa económico a medio plazo (1983-1986). Escenarios macroeconómicos para la economía española*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1984-1985
- SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, *Programa económico a medio plazo: documentos I y II*, Madrid, Secretaría General de Economía y Planificación, [1984].
- SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, *Programa económico a medio plazo (1983-1986). Escenarios macroeconómicos para la economía española*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1984-1985.
- SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, *Programa económico a medio plazo, 1985-88*, II vols., Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General de Economía y Planificación, 1985, vol. I, *Proyecciones de la economía española*; vol. II, *Reformas estructurales e institucionales. Balance de 1984 y perspectivas*.
- SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, *Programa económico a medio plazo, 1986-1990*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General de Economía y Planificación, 1986.
- SECRETARIA GENERAL TÉCNICA, *El IVA hecho fácil*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General Técnica, 1985.
- SECRETARIA GENERAL TÉCNICA, *Del ITE al IVA*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Secretaría General Técnica, 1985.
- SECRETARIA GENERAL TÉCNICA, *Impuestos fiscales de Hacienda Pública*, Madrid, Departamento de Difusión y Propaganda”, 1986.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, *Libro blanco para la reforma del sistema educativo*, Madrid, MEC, 1989

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, *Plan energético nacional: 1978-1987*, Madrid, Ministerio de Industria y Energía, 1979.

- *Libro blanco de la reindustrialización*, Madrid, Ministerio de Industria y Energía, 1983.

MINISTERIO DE PRESIDENCIA, *Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura*, Madrid, Ministerio de Presidencia, 2006.

MINISTERIO DE TRABAJO, *Libro Blanco sobre la Seguridad Social*, Madrid, SubSecretaría de la Seguridad Social, 1979.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, *La negociación colectiva en las grandes empresas...*, para entre los años 1984-1992.

- *Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales*, Madrid Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1995-...
- SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y LABORALES, *Encuesta de calidad de vida en el trabajo: año...*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999-...

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, *Boletín de Estadísticas Laborales*, CXXXI vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983-...

- *Sinopsis sobre Mercado de Trabajo y Política de Empleo en España: 1975-1983 (Análisis de las estadísticas y relación de medidas adoptadas*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983.
- *Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical. Proyecto de Ley por el que se modifica determinados artículos de la Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores. Proyecto de Ley de Protección por desempleo por el que se modifica el título segundo de la Ley 51/1980 de 8 de octubre*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983.
- *Empleo y paro en España durante...: coyuntura y programas de actuación*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984-1985.
- *Acuerdo Económico y Social, 1985-86*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.
- *Estructura y contenidos básicos de la negociación colectiva en España: datos de 1986*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.
- *Informe Malinvaud sobre estadísticas del empleo y del paro [Informe de la misión encomendada a Jacques Chirac a Edmond Malinvaud]*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.
- *Documento de trabajo para el diálogo social sobre el empleo*, Madrid, 3 de abril de 1989.
- *Proyecto del Real Decreto por el que se establecen incentivos a la contratación laboral de carácter estable*, Madrid, julio de 1989.
- *Encuesta de coyuntura laboral*, Madrid, Dirección General de Informática y Estadística, 1990-1994.
- *La reforma política de empleo y de los servicios públicos de empleo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
- *Estudios preparatorio para la Ley de prestaciones no contributivas*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
- *Los sistemas de Seguridad Social y las nuevas realidad sociales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.
- *Anuario de estadísticas laborales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983-1994.
- *La seguridad social en el umbral del siglo XX. Estudio económico-actuarial*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1996.
- *20 años de concertación y diálogo social en España: catálogo exposición gráfica*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1998.
- DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, *Mercado de trabajo en España durante 1985. Coyuntura y programas de actuación*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.
- DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, *Mercado de trabajo en España durante 1986. Coyuntura y programas de actuación*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987.
- DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, *Mercado de trabajo en España durante 1987. Coyuntura y programas de actuación*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.

MIRÁS AMOR, Julio, "Estadísticas sobre la actividad económica de la población. La Encuesta de Población Activa", *Situación: revista de situación económica*, nº 3, (1992), pp. 75-82.

MIRALLES, Melchor, *GAL: la historia que sacudió el país*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2006.

- y SATÚE, Francisco J., *Alfonso Guerra: el conspirador*, 2ª ed., Madrid, Temas de Hoy, 1991.
- MISHAN, Edward, *The Economic Growth Debate: An Assessment*, London, George Allen y Unwin, 1977.
- MISSOC, *Social protection in the member states of the European Union: situation on 1 January 1998*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999.
- MOCHÓN, Francisco, *Vigencia de las ideas keynesianas*, Málaga, Universidad de Málaga, 1990.
- MONDEJAR JIMÉNEZ, José y MONTERO LORENZO, José Mª, “El empleo femenino en las regiones españolas: un análisis estadístico desde la perspectiva de la estrategia europea para el empleo”, *Cim.economía*, nº 7, (2005), pp. 19-60.
- MOIX, Terenci, *Garras de astracán*, Barcelona, Círculo de Lectores, 1991.
- MOLERO MANGLANO, Carlos, *Fundamentos de las relaciones laborales colectivas*, Madrid, Reus, 1986.
- MOLINA ÁLVAREZ de CIENFUEGOS, Ignacio, “La liberalización de la economía española (por efecto de la pertenencia a la Unión Europea)” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del sistema político español*, Madrid, Istmo, 2001, pp. 293-238.
- MOLINA HERMOSILLA, Olimpia, *La dimensión jurídica de la política de empleo: el derecho del empleo como nueva categoría sistemática*, Sevilla, Mergablum, 2006.
- MOLINAS, César, SEBASTIÁN, Miguel y ZABALZA, Antonio (eds.), *La economía española: perspectivas macroeconómicas*, Madrid, Antonio Bosh / Instituto de Estudios Fiscales, 1991.
- MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere, *Els industrials catalans durant en franquisme*, Vic, Eumo, 1991.
- YSÀS, Pèrre, *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad en la España franquista*, Madrid, Siglo XXI, 1998.
- (ed.), *La transición, treinta años después*, Barcelona, Península, 2006.
- YSÀS, Pere, “El partido del antifranquismo (1956-1977)” en BUENO LLUCH, Manuel, HINOJOSA, José y GARCÍA GARCÍA, Carmen (eds.), *Historia del PCE: I Congreso, 1920-1977*, II vols., Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007, vol. II, pp. 13-32.
- “La política de reconciliación nacional. Su contenido durante el franquismo, su lectura en la Transición”, *Ayer*, nº 66, (2007), pp. 201-255.
- YSÀS, Pere, *La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977*, Barcelona, Crítica, 2008.
- “La Ley de Amnistía de 1977: la reivindicación antifranquista y su lectura treinta años después” en ESPUNY TOMÁS, Mª Jesús y PAZ TORRES, Olga (coords.), *30 años de la Ley de Amnistía (1977-2007)*, Barcelona, Dykinson, 2009, pp. 41-56.
- YSÀS, Pere (coords.), *Construint la ciutat democràtica: el moviment veïnal durant el tardofranquisme i la Transició*, Bellaterra / Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona / Icaria, 2010.
- YSÀS, Pere, *Els anys del PSUC. El partit del antifranquisme (1956-1981)*, Barcelona, L’Avenç, 2010.
- “El acceso a los archivos y la investigación histórica”, *Ayer*, nº 81, (2011), pp. 285-297
- “Nuevas formas de sindicalismo en un tiempo de contestación: CGIL y CCOO, 1966-1976” en *Asociacionismos, conflicto y representatividad*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 72, (2012), pp. 133-153.
- MOLINS, Joaquim y OÑATE, Pablo (eds.), *Elecciones y comportamiento electoral en la España multinivel*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006.
- MOLTO CALVO, Miguel Ángel, *Nuevas interpretaciones de la curva de Philips ampliada para España*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1976.

MONEDERO, Juan Carlos (comp.), *El retorno a Europa: de la perestroika al Tratado de Maastricht*, Madrid, Editorial Complutense, 1993.

- PANIAGUA, Juan Luis (eds.), *En torno a la democracia en España: temas abiertos del sistema político español*, Madrid, Tecnos, 1999.
- “El misterio de la transición embrujada (un collage generacional sobre la transición española)” en id. y PANIAGUA, Juan Luis (eds.), *En torno a la democracia en España. Temas abiertos del sistema político español*, Madrid, Tecnos, 1999, pp. 103-232.
- *La transición contada a nuestros padres: nocturno de la democracia española*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011.

MONEREO PÉREZ, José Luis, *Las reconversiones industriales en el derecho del trabajo*, Granada, Universidad de Granada, 1988.

- (coord.), *La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral (XII Jornadas Universitarias andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)*, Granada, Universidad de Granada, 1996.
- *El sistema de protección por desempleo en España*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997.
- *Concertación y diálogo social*, Valladolid, Lex Nova, 1999.
- *Las nuevas políticas de protección por desempleo y su reflejo en el sistema jurídico*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003.
- “Huelgas generales: fundamento, legitimidad y dinámica de tutela. Reflexiones iuslaborales”, *Aranzadi Social*, vol. III, n° 3, (2010), pp. 11-17.
- MOLINA NAVARRETE, Cristóbal y MORENO VIDA, M^a Nieves (coord.), *La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras: homenaje al profesor José Vida Soria con motivo de su jubilación*, Granada, Comares, 2008.
- *La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral*, Albacete, Bomarzo, 2011.

MONJO, Anna, *Militants. Democràcia i participació a la CNT als anys trenta*, Barcelona, Laertes, 2003.

MONREAL LUQUE, Alberto (coord.), *El coste social de la crisis económica española y las líneas básicas de una política de recuperación*, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia, 1983.

MONTALVO, Jaime, “Anotaciones a la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988”, *Documentación Laboral*, n° 24, (1988), pp. 281-302.

MONTÁVEZ GARCÉS, M^a Dolores y BAJO RUBIO, Óscar, “Tipos de cambio, expectativas y nueva información: la peseta, 1986-1996”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. VIII, n° 23, (2000), pp. 71-92.

MONTEIRA, Félix, “La huelga general” en JULIÁ, Santos, PRADERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la transición*, Madrid, Taurus, 1996, pp. 625-634.

MONTERO, Alberto, “La programación económica del Gobierno: crónica de una imprecisión permanente” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara de la política económica: España, 1982-1994*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994, pp. 121-150.

MONTERO, José Ramón, “Los fracasos políticos y electorales de la derecha española: Alianza Popular, 1976-1986”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 39, (1987), pp. 7-43.

- y PALLARÉS, Francesc, *Los estudios electorales en España: un balance bibliográfico (1977-1991)*, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1992.

MONTERO GARCÍA, Feliciano (ed.), *El despegue de la Iglesia*. Dossier monográfico, *Historia del Presente*, n° 10, (2007).

MONTERO LORENZO, J. M^a, *Estadística para las relaciones laborales*, 2^a ed., Madrid, AC, 2002.

MONTERO ROMERO, Ricardo, *La inserción en la actividad económica: empleo y paro juvenil*, vol. VI, dentro de ZARRAGA, José Luis (dir.), *Informe Juventud de España 1985. La inserción de los jóvenes en la sociedad*, VII vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 1985.

MONTES, Pedro, “Apertura e integración de la economía española: de la adhesión a la CEE al mercado único” en ALBARRACÍN, Jesús (ed.), *Reflexiones sobre política económica*, Madrid, Editorial Popular, 1991, pp. 69-93.

- *La integración en Europa: del plan de estabilización a Maastricht*, Madrid, Trotta, 1993
- *El desorden neoliberal*, Madrid, Trotta, 1996.

MONTESINOS, David P., *La juventud domesticada: cómo la cultura juvenil se convirtió en simulacro*, Madrid, Popular, 2007.

MONTORO BALLESTEROS, Alberto, *Conflicto social: derecho y proceso*, Murcia, Universidad de Murcia, 1980.

MONTORO, Cristóbal, “Crisis y renovación de la política fiscal española” en *El debate macroeconómico ante la Unión Monetaria*. Dossier monográfico, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 24, (1992), pp. 48-71.

MONTOYA MELGAR, Alfredo, “La estabilidad en el empleo: recuperación de un principio”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 33, (2001), pp. 61-73.

MONTUENGA GÓMEZ, Víctor Manuel, *Salario, productividad e inflación en la economía española*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.

MONZÓN, Cándido, *Encuestas y elecciones*, Madrid, Tecnos, 2005.

MORADIELLOS, Enrique, *Las caras de Clío: una introducción a la historia*, Madrid, Siglo XXI, 2001.

- *El oficio del historiador*, 6ª ed., Madrid, Siglo XXI, 2008.

MORAL, Esther y HURTADO, Samuel, “Evolución de la calidad del factor trabajo en España”, *Documento Ocasional. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 0306, (2003).

MORAL, Félix, (redacción), *La opinión pública española ante Europa y los europeos*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1989.

- “Los desempleados en la unidad familiar: proveedores y dependientes”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 86, (1999), pp. 153-184.
- *Veinticinco años después. La memoria del franquismo y de la transición a la democracia en los españoles del año 2000*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001.
- *Las condiciones de vida de los jóvenes desempleados*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2002.

MORAL SANDOVAL, Enrique (dir.) [Comité del Centenario del Partido Socialista Obrero Español], *Cien años por el Socialismo. Historia del PSOE (1879-1979)*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1979.

MORALES, José Luis y CELADA, Juan, *La alternativa militar: el golpismo después de Franco*, Madrid, Revolución, 1982.

MORALES MOYA, Antonio y ESTEBAN, Mariano, (eds.), *La historia contemporánea de España. Primer Congreso de Historia Contemporánea de España [1º, 1992, Salamanca]*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996.

- (coord.), *La modernización social*, Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 2001.

MORALES NAVARRO, Julián y ABAD MÁRQUEZ, Luis Vicente, *Introducción a la sociología*, Madrid, Tecnos, 2008.

MORÁN, Fernando, *España en su sitio*, Barcelona, Plaza & Janés / Cambio 16, 1990.

- y VIDAL, Juan Carlos, *Luz al fondo del túnel. Fernando Morán en diálogo con Juan Carlos Vidal*, Madrid, Alianza, 1999.
- *1982, el año clave*, Madrid, Aguilar, 2002.

MORÁN, Gregorio, *Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985*, Barcelona, Planeta, 1986.

- *El precio de la transición. Una interpretación diferente y radical del proceso que condujo a España de la dictadura a la democracia*, Barcelona, Planeta, 1992.

MORÁN, M^a Luz “Un intento de análisis de la «clase parlamentaria» española: Elementos de renovación y de permanencia”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 45, (1989), pp. 61-84.

- BENEDICTO, Jorge, *La cultura política de los españoles: un ensayo de reinterpretación*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995.

MORÁN CARRILLO, Agustín, “Auge y crisis de los grandes acuerdos sociales de los 80” en *Nuevas tendencias de la Negociación Colectiva*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, nº 9, (1986), pp. 13-55.

- “Precariedad y crisis del sindicalismo: ¿Qué precariedad? ¿Qué crisis? ¿De qué sindicalismo?” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social*. Dossier monográfico *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, nº 29 (2007), pp. 491-512.

MORATA, Francesc, *La Unión Europea. Procesos, políticas, actores*, Barcelona, Ariel, 1998.

MOREIRA PELÁEZ, Jorge, “Novedades fiscales en materia de Instituciones de Inversión Colectiva”, *Estrategia Financiera*, nº 214, (2005), pp. 66-71.

MORENO, Agustín, “Prólogo” en CCOO. SECRETARÍA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de la Moncloa al AES*, Madrid, Confederación Sindical de CCOO / Secretaría Confederal de Formación y Cultura, 1989.

- “Breve historia del Estatuto de los Trabajadores, de sus reformas y consecuencias. El déficit laboral en España” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *La clase trabajadora, después del Estatuto de los Trabajadores y sus reformas*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 26/27 (2008), pp. 221-236.

MORENO, Amparo, *Mujeres en lucha: el movimiento feminista en España*, Barcelona, Anagrama, 1977.

MORENO FERNÁNDEZ, Luis y PÉREZ YRUELA, Manuel (comps.), *Política social y estado del bienestar*, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1995.

- SARASA URDIOLA, Sebastián (comps.), *El Estado del Bienestar en la Europa del Sur*, Madrid, CSIC, 1995.

MORENO JUSTE, Antonio (ed.), *España y el proceso de construcción europea*, Barcelona, Ariel, 1998.

- “El proceso de construcción europea: de la CECA al Tratado de Maastricht” en PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos (coord.), *Historia de las relaciones internacionales contemporáneas*, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 561-584.

MORENO MÍNGUEZ, Almudena, *Economía, empleo y consumo: las transiciones juveniles en el contexto de la globalización*, vol. II, dentro de, *Informe 2008: Juventud en España. Jóvenes en una sociedad cambiante: demografía y transiciones a la vida adulta*, V vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 2009.

MORENO-TORRES HERRETA, M^a Rosa, “Las falsedades documentales en el código penal de 1995. A propósito de las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1997 (caso Filesa) y 26 de febrero de 1998 (caso Argentaria Trust)”, *Actualidad Penal*, nº 46, (1999), p. 46.

MORENO VALERO, Pablo Antonio, “La armonización del Impuesto sobre Sociedades”, *Boletín Económico del ICE*, nº 2730, (2002), pp. 21-30.

MORENO VIDA, M^a Nieves, *Los pactos sociales en el derecho del Trabajo*, Granada, Universidad de Granada, 1989.

MORERA, Julio, “La fundación de USO: circunstancias políticas y objetivos”, *Debat*, nº 5, (1985)

MORILLAS, Juan Rafael, “Objetivos de los votantes, accountability de los políticos: El comportamiento electoral de los votantes cambiantes al PSOE en las elecciones generales de 1993 y la accountability del incumbent”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 156, (2000).

MORILLAS RAYA, Antonio y SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Jesús, “Actividad, empleo y trabajo en España según la Encuesta de Población Activa”, *Revista de Estudios Regionales*, nº 36, (1993), pp. 333-364.

MOSCOSO, Leopoldo, “De Trabajadores a Ciudadanos y Viceversa. La Crisis del Trabajo en la perspectiva de dos fines de siglo”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XXI, nº 1 (2003), pp. 13-32.

MOTA, Jesús, “Entrevista con Carlos Solchaga” en JULIÁ, Santos, PRADRERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la transición*, Madrid, Taurus, 1996, pp. 564-568.

MOTA, Jesús, *La gran expropiación: las privatizaciones y el nacimiento de una clase empresarial al servicio del PP*, Madrid, Temas de Hoy, 1998.

MORAL, Félix (redacción), *La opinión pública española ante Europa y los europeos*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1989.

MORA ROSADO, Sebastián, “La dinámica histórica de la exclusión social”, *Documentación Social*, nº 149-150, (2008), pp. 129-158.

MORÁN, Gregorio, *Adolfo Suárez: historia de una ambición*, Barcelona, Planeta, 1979.

- *Adolfo Suárez: Ambición y Destino*, Barcelona, Debate, 2009.

MORENO FERNÁNDEZ, Luis y SARASA URDIOLA, Sebastián (comps.), *El Estado del Bienestar en la Europa del Sur*, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1995.

- (ed.), *Reformas de las políticas del bienestar en España*, Madrid, Siglo XXI, 2009.

MORENO MÍNGUEZ, Almudena, “El mito de la ruptura intergeneracional en los jóvenes españoles” en *Emancipación y familia*. Dossier monográfico, *Revista de estudios de juventud*, nº 58, (2000), pp. 33-43.

MORGADA PANADERO, Purificación (coord.), *Jóvenes y políticas públicas*, Madrid, La Ley, 2008.

MOSCA, Lorenzo, “MayDay parade. Movilizaciones juveniles contra la precariedad laboral” en *Movilización social y creatividad política de la juventud*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 75, (2006), pp. 75-97.

MOSCOSO, Leopoldo, “¿En qué consiste pensar históricamente?” en SÁNCHEZ LEÓN, Pablo y IZQUIERDO MARTÍN, Jesús (eds.), *El fin de los historiadores: pensar históricamente en el siglo XXI*, 2008, pp. 2-36.

MOTA MUÑOZ, José Fernando, “La huelga de los 21 días de 1977: conflictividad en la construcción de Barcelona durante la transición”, *Historia, Trabajo y Sociedad*, nº 1, (2010), pp. 29-52.

MOULIER-BOUTANG, Yann, *De l'esclavage au salariat: Economie historique du salariat bride*, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.

- *De la esclavitud al trabajo asalariado. Economía histórica del trabajo asalariado embridado*, Madrid, Akal, 2006.

MOYA, Carlos, *El poder económico en España*, Madrid, Túcar, 1975.

MUGA ROBLEDO, Antonio, “Estructura y cobertura de la negociación colectiva en España” en *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 18, (1992), pp. 27-35.

MÚGICA, Enrique, *Itinerario hacia la libertad*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

- “Sobre las memorias de Alfonso Guerra”, *Letra Internacional*, nº 83, (2004), pp. 79-82.

MULAS GARCÍA, Alejandro, “Los Pactos sociales españoles. De La Moncloa al Acuerdo Interconfederal/83. A modo de introducción histórica al AI/83”, *Documentación Social*, nº 7, (1983), pp. 95-12.

- “Proyecto de Ley por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores”, *Documentación Laboral*, nº 9, (1983), pp. 85-114.

- “Sobre la directiva CEE de 17/2/1975, relativa a los despidos colectivos: Notas a una cuestión polémica”, *Documentación Laboral*, nº 13, (1984), pp. 47-76.

MULAS GRANADOS, Carlos, SALINAS JIMÉNEZ, Javier y ONRUBIA FERNÁNDEZ, Jorge, “Política presupuestaria en España (1978-2003)” en ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago y SALINAS JIMÉNEZ, Javier (coords.), *El gasto público en la democracia: estudio en el XXV aniversario de la Constitución española de 1978*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2003, pp. 383-406.

MUNS, Joaquín, *Historia de las relaciones entre España y el Fondo Monetario Internacional, 1958-1982: veinticinco años de economía española*, Madrid, Alianza / Banco de España, 1985.

- “España y el Fondo Monetario Internacional”, *Economistas*, vol. XIX, nº 90, (2001), pp. 20-26.

MUÑIZ, Miguel, “La estrategia económica del PSOE”, *Zona Abierta*, nº 23, (1980), pp. 19-27.

- “Opciones de política económica” en *Sistema*, nº 80-81, (1987), pp. 101-110.

MUÑOZ, Juan, *El poder de la banca*, Madrid, Zero, 1970.

- ROLDÁN, Santiago, “Liberalismo económico y estrategia socialista”, *Leviatán*, nº 5, (1981), pp. 35-45.
- y id. “Estrategia económica y la lucha contra el paro”, *Leviatán*, nº 9, (1982), 47-56.

MUÑOZ ALONSO, Alejandro, *Las elecciones del cambio*, Barcelona, Argos Vergara, 1984.

MUÑOZ BARRUTIA, Gustavo, “La alternativa democrática del PSOE: historia de la participación política del PSOE dentro de las plataformas de oposición antifranquista (1970-1977)” en *Actes del Congrés la transició de la dictadura franquista a la democràcia: Barcelona, 20, 21 i 22 d'octubre de 2005*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona / Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, 2005, pp. 175-184.

MUÑOZ de BUSTILLO, Rafael, “Salarios, desempleo y calidad de empleo” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los ochenta*, Madrid / Barcelona, Icaria / Instituto Sindical de Estudios, 1993, pp. 163-195.

- BONETE, Rafael, *Introducción a la Unión Europea. Un análisis desde la economía*, Madrid, Alianza, 1997.
- Protección social y empleo” en *Estado del bienestar: retos y opciones de reforma*. Dossier monográfico, *Quaderns de Política Econòmica*, nº 9, (2005)
- ANTÓN PÉREZ, José Ignacio, BRAÑA PIÑO, Francisco Javier y FERNÁNDEZ MACÍAS, Enrique, *Abandono escolar y mercado de trabajo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009.

MUÑOZ CAMPOS, Juan, “Los contratos temporales en el reformado Estatuto de los Trabajadores”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1985), pp. 97-117.

MUÑOZ CIDAD, Cándido, “Consumo y nivel de vida” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *España, economía: ante el siglo XXI*, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 527-548.

MUÑOZ MACHADO, Santiago, GARCÍA DELGADO, José Luis y GONZÁLEZ SEARA, Luis (dirs.), *Las estructuras del bienestar: propuesta de reforma y nuevos horizontes*, Madrid, Civitas / Escuela Libre Editorial, 2002.

MUÑOZ RUIZ, M^a del Carmen, “Género: masculinidad y nuevo movimiento obrero bajo el franquismo” en BABIANO, José (ed.), *Del hogar a la huelga: trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007, pp. 245-285.

MUÑOZ SÁNCHEZ, Antonio, “La Fundación Ebert y el socialismo español de la dictadura a la democracia”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 29, (2007), pp. 257-278.

- “Europeizar es democratizar: el SPD y la España del tardofranquismo”, *Historia del Presente*, nº 17, (2011), pp. 93-117.
- *El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia*, Barcelona, RBA, 2012.

MUÑOZ SÁNCHEZ, Víctor Manuel, “Apuntes teóricos sobre la crisis del empleo juvenil” en *Reflexiones sobre la juventud del siglo XXI*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 87, (2009), pp. 47-66.

MURDOCK, Graham y McCRON, Robin, “Consciousness of class and consciousness of generation” en HALL, Stuart y JEFFERSON, Tony (eds.), *Resistance through Rituals. Youth subcultures in post-war Britain*, 2ª ed., New York, Routledge, 2006 [1993], pp. 162-177.

MURGUI IZQUIERDO, Juan Santiago, MURO, Juan de Dios y URIEL JIMÉNEZ, Ezequiel, “Correcciones de las estimaciones de la Encuesta de Población Activa mediante la utilización de encuesta repetida” TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, vol. III, pp. 1327-1376.

MURILLO, Manuel, *PSOE (s.h)*, Madrid, Albia, 1977.

MURRILLO ARROYO, Francisco Javier, “El progreso de acumulación en España (1973-2005): ¿Progreso material para todos?”. Comunicación presentada en, *XI Jornadas de Economía Crítica*, Bilbao, 27, 28 y 29 de marzo 2008.

MURO, Juan de Dios, RAYMOND, José Luis L., TOHARIA, Luis y URIEL, Ezequiel, *Análisis de las condiciones de vida y trabajo en España*, Madrid, Secretaria de Estado de Economía, 1988.

MYRO SÁNCHEZ, Rafael, “Las grandes empresas industriales españolas: Una comparación con el resto de los países de la CEE”, *Economía Industrial*, nº 257, (1987), pp. 135-155.

- “Segunda reconversión y política industrial”, *Papeles de Economía Española*, nº 50, (1992), pp. 186-191.

NADAL, Jordi, CARRERAS, Albert y SUDRIÀ, Carles (comps.), *La economía española en el siglo XX: una perspectiva histórica*, Barcelona, Ariel, 1991 [1987].

- CARRERAS, Albert (eds.), *Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX)*, Barcelona, Ariel, 1990.
- [et al.], *La cara oculta de la industrialización española. La modernización de los sectores no líderes (siglos XIX y XX)*, Madrid, Alianza, 1994.
- (dir.), *Altas de la industrialización de España, 1750-2000*, Barcelona, Crítica / Fundación BBVA, 2003, incluye un CD-ROM.

NAREDO, José Manuel, *La economía en evolución: historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda / Siglo XXI, 1987.

- “Riqueza personal y familiar” en CAMPO, Salustiano del (coord.), *Tendencias sociales en España (1960-1990)*, III vols., Bilbao, Fundación BBV, 1993, vol. III, pp. 47-84.
- *La burbuja inmobiliario-financiera en la coyuntura económica reciente (1985-1995)*, Madrid, Siglo XXI, 1996.
- *La evolución de la agricultura en España (1940-1990)*, Granada, Universidad de Granada, 1996.

NAREJO, José Manuel, CARPINTERO, Óscar y MARCOS, Carmen, *Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española, 1992-2004*, Madrid, FUNCAS, 2005.

NAROCKI, Claudia, *Evaluación económica de la siniestralidad laboral: una aproximación a la realidad española*, Madrid, ISTAS-MAPFRE, 1995.

- “La prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas españolas”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, nº 10, (1997), pp. 157-181.

NASH, Elizabeth., “The Spanish Socialist Party Since Franco: From Clandestinely to Government, 1976-1982” en BELL, David S. (ed.), *Democratic Politics in Spain: Spanish Politics after Franco*, London, St. Martin's Press, 1983, pp. 29-62.

NASH, Mary, *Dones en transició. De la resistència política a la legitimitat: les dones en la Barcelona de la Transició*, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007.

NAVAJAS, Carlos, “«No más golpes de Estado». La política de Defensa de Narcís Serra (1982-1996)” en SOTO CARMONA, Álvaro (ed.), *La primera legislatura socialista, 1982-1986*. Dossier monográfico *Historia del Presente*, nº 8, (2006), pp. 103-120.

NAVARRETE, Lorenzo (dir.), *Jóvenes, derechos y ciudadanía*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2006.

- (dir.), *Jóvenes adultos y consecuencias demográficas, 2001/2005*, Madrid, Instituto de la Juventud, [2006].

NAVARRO, Mikel, “La política de reconversión industrial en España”, *Información Comercial Española*, nº 665, (1989), pp. 45-69

NAVARRO, Vicenç, “Neoliberalismo, desempleo, empleo y Estado del Bienestar”, *Sistema*, nº 134, (1996), pp. 27-64.

- “La economía política del Estado del Bienestar”, *Sistema*, nº 148, (1999), pp. 3-55.
- *Neoliberalismo y estado del bienestar*, 3ª ed., Barcelona, Ariel, 2000.
- *Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país*, Barcelona, Anagrama, 2002.
- *Subdesarrollo social de España: causas y consecuencias*, Madrid, Anagrama, 2006.
- (dir.), *La situación social en España*, Madrid, Biblioteca Nueva, III vols.: vol. I, 2006, vol. II, 2007.
- (dir.), *La situación social en España*, Madrid, Biblioteca Nueva / Fundación Francisco Largo Caballero, vol. III, 2009.
- TORRES LÓPEZ, Juan y GARZÓN ESPINOSA, Alberto, *Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España*, Madrid, Sequitur / ATTAC, 2011.
- “Desigualdad, crisis y competitividad. Las insuficiencias en la sabiduría convencional sobre las causas de la crisis y el error de sus soluciones”, *Gaceta Sindical: reflexión y debate*, nº 17, (2011), pp. 127-133.

NAVARRO BOTELLA, Francisco José, *Las elecciones sindicales de 1982*, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1983.

NAVARRO LÓPEZ, Manuel y MATEO RIVAS, Mª José (dirs.), *Informe Juventud en España '92*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1993.

NAVARRO NAVARRO, Francisco Javier, “Mundo obrero, cultura y asociacionismo: Algunas reflexiones sobre modelos y pervivencias formales”, *Hispania*, vol. LXIII/2, nº 214, (2003), pp. 467-484.

NAVARRO PASCUAL, Reyes, *El presupuesto y la estabilidad económica en la democracia española*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2007.

NAVINÉS BADAL, Ferrán, “Crisis económica y política económica. El caso de la economía española (1964-1986)”, *Información Comercial Española*, nº 665, (1989), pp. 25-44.

NEGRI, Antonio, *Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse (I fatti e le idee. Saggi e biografie)*, Milano, Feltrinelli, 1979.

- *Del obrero masa al obrero social*, Barcelona, Anagrama, 1980.
- *Marx más allá de Marx: cuaderno de trabajo sobre los “Grundrisse”*, Madrid, Akal, 2001.
- *La forma-estado*, Madrid, Akal, 2003.
- *Fábricas del sujeto/ontología de la subversión: antagonismo, subsunción real, poder constituyente, multitud, comunismo*, Madrid, Akal, 2006.
- *Goodbye Mr. Socialism: la crisis de la izquierda y los nuevos movimientos revolucionarios: conversaciones con Ralf Valvola Scelsi*, Barcelona, Paídos, 2007.

NICOLÁS MARÍN, Encarna y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (eds.), *Mundos de ayer: investigaciones históricas contemporáneas al IX Congreso de la AHC [9º. 2008. Murcia]*, Murcia, Editum, 2009.

- (eds.), *Ayer en discusión: temas claves de la historia contemporánea hoy [IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Murcia, 17, 18 y 19 de septiembre de 2008]*, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2008 [CD-ROM].

NICOLETTI, Giuseppe y SCARPETTA, Stefano, “Regulation, productivity and growth: OECD evidence”, *Working Paper. OECD Economics Department*, nº 347, (2003).

NIELFA CRISTÓBAL, Gloria (ed.), *Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política, cultura*, Madrid, Universidad Complutense, 2003.

NIETO FERNÁNDEZ, Maximiliano, *Dinámica salarial y tendencias de la distribución durante la onda larga del capitalismo español en la segunda mitad del s. xx (1954-2003)*, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 2005.

- “Rentabilidad y distribución en el capitalismo español (1954-2003)”, *Laberinto*, n° 24, (2007), pp. 71-77.

NIETO MONTERO, Juan José, “El principio de capacidad contributiva y su reflejo en la jurisprudencia constitucional”, *Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública*, vol. XLV, n° 238, (1994), pp. 917-962.

NIETO SOLÍS, José A., “El presupuesto de la Unión Europea ante la reforma del Tratado de Maastricht”, *Documento de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid*, n° 6, (1997).

NIÑO BECERRA, Santiago, *El crash de 2010: toda la verdad sobre la crisis*, Barcelona, Los Libros de Lince, 2009.

NISBET, Robert., KUHN, Thomas S. WHITE, Lynn [et al.], *Cambio social*, Madrid, Alianza, 1988.

NUGENT, Ricardo, “La Constitución y el derecho de huelga”, *Derecho Laboral*, vol. XXVI, n° 130, (1983), pp. 223-240.

NOGUERA, José Antonio, “El concepto de trabajo y la teoría social crítica”, *Papers*, n° 68, (2002), pp. 141-168.

NOIRIEL, Gérard, *Sobre la crisis de la historia*, Madrid / Valencia, Cátedra / Universitat de València, 1997.

NORENG, Oystein, *La política del petróleo en la década de los ochenta: normas de cooperación internacional*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

NOREÑA SALTO, José Ramón, *El delito fiscal*, Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid, 1981.

NORES TORRES, Luis Enrique, “El «genoma» laboral: orígenes, componentes y evolución del derecho del trabajo”, *Quaderns de Ciències Socials*, n° 7, (2007), pp. 1-52.

NOYA, Francisco Javier y VALLEJOS, Antonio, *Las actitudes ante la desigualdad en España: resultados del estudio 2046*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1995.

NOVELLA, Joaquim, “El Programa de Convergencia y la Unión Económica y Monetaria: ¿Un plan de ajuste o reformas estructurales?”, *Afers Internacionals*, n° 25, (1993), pp. 37-56.

ÑÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta (coord.), *La gran represión: los años de plomo de la posguerra (1939-1948)*, Barcelona, Flor del Viento, 2009.

NÚÑEZ SEIXA, Xosé Manuel, “La historia social ante el dominio de la historia cultural: algunas reflexiones” en *¿Qué entendemos hoy por historia social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, n° 60, (2008), pp. 177-184.

OBESO, Carlos, *Desempleo y precarización del mercado de trabajo en España*, [Barcelona], ESADE, 1997.

OBJOVEM (Observatorio Joven de Empleo en España), titulado: *Personas jóvenes y economía sumergida en la España contemporánea*, n° 6 (extra) (2009).

OBSERVATORIO DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 2008 [GARCÍA-MONTALVO y PEIRÓ, José M^a], *Análisis de la sobrecualificación y la flexibilidad laboral*, Valencia, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 2008.

OBSERVATORIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA [ESCUDERO, Rafael (coord.)], *La negociación colectiva en España: una mirada crítica*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006.

OCDE [OECD], *Pourquoi des Politiques d'Ajustement Positives?* Paris, OECD, 1979.

- *The Welfare State in Crisis: An Account of the Conference on Social Policies in the 1980's*, Paris, OECD, 1981.
- *The Challenge of Unemployment: A Report to Labour Ministers*, Paris, OECD, 1982.

- *Youth Without Work: Three countries approach the problem*, Paris, OECD, 1982.
- *El desafío del paro*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984.
- *The Nature of Youth Unemployment. An Analysis for Policy-Makers*, Paris, OECD, 1984.
- *Jóvenes sin empleo. Tres estrategias. Informe de Shirley Williams y otros expertos*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984.
- *Perspectives Économiques d l'OCDE*, nº 36, (diciembre 1984).
- *La naturaleza del desempleo de los jóvenes*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.
- *Economic Surveys of 1985-1986*, Paris, OECD, 1986.
- *Estudios económicos de la OCDE. España, mayo 1986*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1986.
- *The Tax/Benefit position of production workers, 1979-1984*, Paris, OECD, 1986.
- *Perspectivas del empleo, 1987*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987.
- *Flexibilidad y mercado de trabajo: el debate actual. Informe técnico* Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987.
- *The Tax/Benefit position of production workers, 1984-1987*, Paris, OECD, 1988.
- *Economy in Transition. Structural Adjustment in OECD Countries*, Paris, OECD, 1989.
- *Ajuste estructural y comportamiento de la economía*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990.
- *La financiación de la vivienda pública: informe elaborado por la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico*, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1990.
- *Economías en transición. El ajuste estructural den los países de la OCDE*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990
- *Labour Market Policies for the 1990s*, Paris, OECD, 1990.
- *Políticas de mercado de trabajo en los noventa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
- *OECD Economic Surveys of 1991-1992. Spain*, Paris, OECD, 1992.
- *The Tax/Benefit position of production workers, 1989-1992*, Paris, OECD, 1993.
- *Políticas para ayudar a los parados de larga duración*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.
- *OECD Economic Surveys of 1992-1993*, Paris, OECD, 1993.
- *Historical Statistics, 1960-1995*, Paris, OECD, 1997.
- *Off to a good start? Jobs for youth*, Paris, OECD, 2010.

OCHEL, Wolfgang and SELWITSCHKA, Markus, "Labour dispute rules and strikes in the European Union", *Cesifo Dice Report*, nº 2, (2003), pp. 63-66.

OFFE, Claus, *La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro*, Madrid, Alianza, 1984.

- [et al.], *Capitalismo y estado*, Madrid, Revolución, 1985.
- *Contradicciones en el estado del bienestar*, Madrid, Alianza, 1990.
- "El crecimiento del sector servicios" en *Zona Abierta*, nº 65-66, (1993), pp. 141-176.

OFICINA DE ESTADÍSTICAS OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS [OFFICE FOR OFFICIAL STATISTICAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES], *Statiscal*

panorama of Europe, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1984.

- *Estadísticas de empleo: métodos y definiciones*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1989.
- *Legal framework for European statistics: the statistical law*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2010.
- *Retrato social de Europea*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1991.

O'BRIEN, Patrick, "Las principales corrientes actuales de Historia Económica", *Papeles de Economía Española*, nº 20, (1984), pp. 383-399.

O'CONNOR, James, *La crisis fiscal del estado*, Barcelona, Ediciones 62, 1981.

- *Crisis de acumulación*, Barcelona, Península, 1987.

O'HIGGINS, Niall, *Youth employment and employment policy. A global perspective*, Genève, International Labour Organization, 2001

- *Desempleo juvenil y política de empleo. Una perspectiva global*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001.

OCHEL, Wolfgang y WEGNER, Manfred, *Service Economies in Europe: Opportunities for Growth*, London, Westview Press, 1987.

OJEDA AVILÉS, Antonio (dir. / coord.), *La concertación social tras la crisis*, Barcelona, Ariel, 1990. Y asimismo: id., *Los contratos de trabajo temporales*, Madrid, Iustel, 2006.

OLÁBARRI, Ignacio, "El Movimiento Obrero en la Historia de España", *Nuestro Tiempo*, nº 225, (1973), pp. 136-142.

- *¿Lucha de clases o conflictos de intereses? Ensayos de historia de las relaciones laborales*, Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, 1991.
- CASPISTEGUI, Francisco Javier (dirs.), *La "nueva" historia cultural: La influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad*, Madrid, Editorial Complutense, 1996.

OLARIETA ALBERDI, Juan Manuel, "Transición y represión política", *Revista de Estudios Políticos*, nº 70, (1990), pp. 225-262

OLARTE ENCABO, Sofía, *Políticas de empleo y colectivos con especiales dificultades: la "subjetivación" de las políticas activas de empleo*, Navarra, Thomson Arandazi, 2009.

OLAVARRI FERNÁNDEZ, Rogelio y GÓMEZ, Pedro, "Estructura industrial de Cantabria" en *Economía Industrial*, nº 263-164, (1988), pp. 89-112.

OLÍAS DE LIMA, Blanca, "Los Gabinetes de los Presidentes de Gobierno en España", *Política y Sociedad*, nº 16, (1994), pp. 257-272.

OLIET PALÁ, Alberto, "Neocorporativismo, Estado y Administración laboral", *Revista de Trabajo*, nº 95, (1989), pp. 31-82.

- *La concertación social en la democracia española: crónica de un difícil intercambio*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004.

OLIN WRIGHT, Erik, "Comprender la clase: hacia un planteamiento analítico integrado", *New Left Review*, nº 60, (2010), pp. 98-112.

OLMOS, Víctor, *Historia del ABC*, Barcelona, Plaza & Janés, 2002.

OLVERA, Alberto, *La sociedad civil: de la teoría a la realidad*, México D. F., El Colegio de México / Centro de Estudios Sociológicos, 2001.

ONAINDIA, Mario, *Otra herencia más: Plan Energético Nacional*, [s/l], Mario Onaindia Natxiondo, 1978.

ONETO, José, *¿A dónde va Felipe?: cambio año I*, Barcelona, Argos Vergara, 1984.

OÑATE, Pablo, *Consenso e ideología en la transición española*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

- (ed.), *Treinta años de elecciones en España*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.

ONRUBIA FERNÁNDEZ, Jorge y SANZ SANZ, José Félix (dirs.), *Redistribución y bienestar a través de la imposición sobre la renta personal*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2003.

- RODADO RUIZ, M^a del Carmen, DIAZ DE SARRALDE, Santiago y PÉREZ LÓPEZ, César, “Progresividad y redistribución a través del IRPF español: Un análisis del bienestar social para el período 1982-1998”, *Documento de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, n° 23, (2006).

ONTIVEROS, Emilio, “Las empresas españolas en el final de siglo” en TUSELL, Javier, LAMO DE ESPINOSA, Emilio y PARDO, Rosa (eds.), *Entre dos siglos: reflexiones sobre la democracia española*, Madrid, Alianza / Fundación José Ortega y Gasset, 1996.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, *La negociación colectiva ante la recesión en los países industrializados con economía de mercado*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.

- [HUSSMANN, Ralf, MEHRAN, Farhad y VERMA, Vijay], *Encuestas de población económicamente activa, empleo, desempleo y subempleo. Manual de la O.I.T. sobre conceptos y métodos*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.
- *La medición del subempleo. [Decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo]*, Ginebra, 6-15 de octubre de 1998, Informe I (ICLS/16/1998/I), Ginebra, 1998.
- *Empleo de los jóvenes: vías para acceder a un trabajo decente*, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2005.
- *Tendencias mundiales del empleo juvenil: octubre de 2008*, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2008.
- *Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones: artículos 19, 22 y 35 de la Constitución. Informe III (Parte 1ª)*, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo, 2010.
- *Plan de Acción (2010-2016). Para alcanzar un amplio grado de ratificación y de aplicación efectiva de los instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo (Convenio núm. 155, su Protocolo de 2002, y Convenio núm. 187. Adoptado por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en su 307ª*, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2010.

ORTEGA, Félix, *Las contradicciones sociales de la modernización*, Madrid, EDESA, 1990.

- “La modernización social como mito”, *Claves de Razón Práctica*, n° 41, (1994), pp. 44-52.

ORTEGA ESTEBAN, José (ed.), *Relaciones sociolaborales: aspectos jurídicos, económicos y sociales*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993.

ORTEGA LÓPEZ, Teresa M^a, “Sobre historia y posmodernidad. La historiografía en los últimos tiempos” en id (coord.), *Por una historia global: el debate historiográfico en los últimos tiempos*, Granada, Universidad de Granada / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 13-40.

ORTEGA Y GASSET, José, *La rebelión de las masas. El tema de nuestro tiempo*, Madrid, El País, 2010 [1923].

ORTÍ, Alfonso, “Transición postfranquista a la Monarquía parlamentaria y relaciones de clase: del desencanto programado a la socialtecnocracia transnacional”, *Política y sociedad*, n° 2, (1989), pp. 7-20.

ORTIZ, Javier, *El felipismo de la A a la Z*, Madrid, Espasa-Calpe, 1996.

ORTIZ HERAS, Manuel, “Movimientos sociales y sociabilidad en Castilla-La Mancha durante el segundo franquismo” en MATEOS, Abdón y HERRERÍN, Ángel (eds.), *La España del presente: de la dictadura a la democracia [II Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores del Presente] [2º, 2005, Madrid]* Segovia, Asociación de Historiadores del Presente, 2006, pp. 309-332.

- CASTELLANOS LÓPEZ, José Antonio y MARTÍN GARCÍA, Oscar, “Historia social y política para una transición. El cambio desde abajo y la construcción de una autonomía: Castilla-La Mancha”, *Historia Actual Online*, nº 14, (2007), pp. 115-126.
- ORTIZ LALLANA, M^a del Carmen, “Planteamientos y perspectivas para una política de concertación social en España (una aproximación a los nuevos objetivos y métodos)”, *Revista de Trabajo*, nº 95, (1989), pp. 7-23.
- ORTS BERENGUER, Enrique, LÓPEZ, M. J., BOIX, Pere y RODRIGO, Fernando, “Trabajo temporal y siniestralidad laboral en España en el período 1988-1995”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, nº 11, (1995), pp. 275-319.
- ORTUÑO ANAYA, Pilar, *Los socialistas europeos y la transición española (1959-1977)*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2005.
- OSCA SEGOVIA, Amparo y LÓPEZ, Blanca, “Factores explicativos de la accidentalidad en jóvenes: un análisis de la investigación”, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 79, (2007), pp. 75-90.
- OTERO CARVAJAL, Luis Enrique, “La transición económica. Del capitalismo corporativo a la Unión Europea” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús (coord.), *Historia de España siglo XX (1939-1996)*, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 365-451.
- “Izquierda Unida: un dilema imposible” en BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coords.), *Estrategias de alianza y políticas unitarias en la historia del PCE*. Dossier monográfico *Papeles de la FIM*, nº 24, (2006), pp. 276-313.
- OTERO GIRÁLDEZ, M^a Soledad y GRADÍN LAGO, Carlos Manuel, “Incorporación laboral de la mujer en España y su efecto sobre la desigualdad de la renta familiar”, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 47, (2001), pp. 226-247.
- OTXOA, Isabel, *El recorte de derechos en las reformas laborales*, Bilbao, Manu Robles / Arangiz Institutua, 2007.
- OUTES RUSO, José L., *La crisis del sector naval y su repercusión en Galicia* [Santiago de Compostela] Fundación Caixa Galicia, 1990.
- OXLEY, Howard y MARTIN, John P, “Controlling Government Spending and Deficits: Trend in the 1980s and Prospects for the 1990s”, *OECD Economic Studies*, vol. XVII, (1991), pp. 154-189.
- OYÓN, José Luis, “Història urbana com a història obrera: algunes reflexions sobre *La quiebra de la ciudad popular*” en *Segle XX: Revista Catalana d’Història*, nº 3, (2010), pp. 149-163.
- “Una ciutat desigual” en *Segle XX: Revista Catalana d’Història*, nº 3, (2010), pp. 179-191.
- PABLOS ESCOBAR, Laura de, “Incidencia y tipos efectivos del Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 4, (2006).
- PAÉZ-CAMINO, Feliciano, “Tradición y mitos en el socialismo español”, *Leviatán*, nº 5, (1981), pp. 73-82.
- PAGÈS i BLANCH, Pelai (dir.), *Franquisme i repressió: la repressió franquista als països catalans (1939-1975)*, València, Universitat de València, 2004.
- *Les lleis repressives del franquisme (1936-1975)*, Valencia, Tres i Quatre, 2010.
- PALACIO MORENO, Juan Ignacio, “La política de empleo” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999 [1991], pp. 307-320.
- PALMER, Bryan D., “La teoría crítica, el materialismo histórico y el supuesto fin del marxismo: retorno a *La miseria de la teoría*”, *Historia Social*, nº 18, (1994), pp. 125-151.
- “Respuesta a Joan Scott” en *Historia Social*, nº 4, (1989), pp. 99-110.
- PALOMARES, Alfonso S., *El Socialismo y la polémica marxista*, Barcelona, Bruguera, 1979.
- *El hombre y el político*, 3^a ed., Barcelona, Ediciones B, 2005.
- PALOMARES, Cristina, *Sobrevivir después de Franco. Evolución y triunfo del reformismo, 1964- 1977*, Madrid, Alianza, 2006.

- “Nuevas mentalidades políticas en el tardo-franquismo” en TOWSON, Nigel (coord.), *España en cambio: el segundo franquismo, 1959-1975*, Madrid, Siglo XXI, 2009, pp. 103-128.

PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel-Carlos, “El desarrollo reglamentario del Estatuto de los Trabajadores (1980-1982)”, *Revista de Política Social*, nº 137, (1983), pp. 9-30.

- “Un compañero de viaje histórico del Derecho del Trabajo: la crisis económica”, *Revista de Política Social*, nº 143, (1984).
- *La política de empleo en España (1977-1982): un quinquenio de política centrista ante la crisis económica*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Instituto de Estudios Laborales, 1985.
- “Los sindicatos españoles en el umbral del mercado único: de la acción unitaria a la neoconcertación social” en *El sindicalismo*. Dossier monográfico, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 10, (1990), pp. 62-71.
- *Los derechos laborales en la Constitución española*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
- “Concertación social y Plan de Convergencia con la Comunidad Europea: el agotamiento del segundo ciclo de Diálogo Social”, *Boletín del Círculo de Empresarios*, nº 55, (1992), pp. 57-68.
- “El derecho constitucional de huelga y su regulación en España”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, nº 17, (1993), pp. 51-57.
- *Derecho sindical español*, 5ª ed., Madrid, Tecnos, 1994.
- “La libertad sindical colectiva” en VALDÉS DAL-RE, Fernando (dir.), *30 años de libertad sindical*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007, pp. 34-49.

PANIAGUA, Javier (coord.), “Movimientos sociales”. Dossier monográfico, *Debats*, nº 2/3, (1982), pp. 89-136.

- *Los usos de la historia*, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente, 2000.
- “La historia social en el diván del psicoanalista” en *¿Qué entendemos hoy por historia social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp. 193-200.
- *La transición democrática: de la dictadura a la democracia en España (1973-1986)*, Madrid, Anaya, 2009.

PANIAGUA, Juan Luis (dir.), *Informe sobre políticas de la juventud en España 99*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1999.

- RAMIRO FERNÁNDEZ, Luis, *Voz, conflicto y salida: un estudio sobre faccionalismo. Nueva Izquierda, 1992-2001*, Madrid, Editorial Complutense, 2003.

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, “Los motivos y formulación de las políticas de ajuste positivo de la crisis”, *Papeles de Economía Española*, nº 17, (1983), pp. 3-11.

PAPELL, Antonio, *Conversaciones con Luis Yáñez*, Barcelona, Plaza & Janés, 1991.

PARAMIO, Ludolfo, “El bloque dominante ante la ruptura democrática”, *Zona Abierta*, nº 7, (1976), pp. 3-14

- “¿Es posible una política socialista?”, *Zona Abierta*, nº 20, (1979), pp. 77-88
- “El final del desencanto”, *Leviatán*, nº 9, (1982), pp. 17-32.
- MARTÍNEZ REVERTE, Jorge, “Por una reforma moral e intelectual de España”, *Leviatán*, nº 10, (1982), pp. 23-26.
- “La crítica marxista del Estado del Bienestar”, *Sistema*, nº 30-31, (1987), pp. 39-52
- *Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo*, Madrid, Siglo XXI, 1988.

- “Los sindicatos y el sistema político en la España democrática: de la clandestinidad a la huelga general”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 73-82
 - “Marxismo analítico”, *Claves de Razón Práctica*, nº 7, (1990), pp. 59-65.
 - Trabajadores y ciudadanos: el socialismo y los movimientos sociales”, *Sistema*, nº 98, (1990), pp. 47-56.
 - “El materialismo histórico como programa de investigación”, *Documentos CSIC*, nº 4, (1992).
 - “Estado del bienestar y ciudadanía” en FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás (coord.), *Estado de bienestar: perspectivas y límites*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1998, pp.13-26.
 - *La socialdemocracia*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009.
- PARDO, Gustavo, *Breve historia de la UGT de Asturias: 1986-1994*, Oviedo, Fundación Asturias, 1998.
- PARDO, Rafael y MARTÍNEZ, Roberto, “El asociacionismo empresarial en la transición”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), pp. 84-11.
- PAREDES GÓMEZ, Raquel, “La armonización del Impuesto de Sociedades en la C.E.E.: la estrategia española”, *Documento de Trabajo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid*, nº 9301, (1993).
- “Análisis comparativo del gravamen efectivo sobre la renta empresarial entre países y activos en el contexto de la Unión Europea (2001)”, *Documento de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 30, (2002).
- PARÍS, Carlos, *La lucha de clases*, Madrid, Mañana, 1977.
- PARELLA, Sonia, *Desigualdades de género, jóvenes inmigrantes*, vol. V, dentro de, *Informe 2008: Juventud en España. Jóvenes en una sociedad cambiante: demografía y transiciones a la vida adulta*, V vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 2009.
- PARENTI, Michael, *History as Mystery*, San Francisco, City Lights Books, 1999.
- *La historia como misterio*, Hondarribia, Hiru, 2003.
 - *The Culture Struggle*, New York, Seven Stories, 2006.
 - *La lucha de la cultura*, San Sebastián, Hiru, 2007.
- PARRA LUNA, Francisco, *Políticas de empleo y bienestar social: el caso español 1982-87*, Madrid, EUDEMA, 1988.
- PARRADO, Salvador, *Las élites de la administración estatal (1982-1991): estudio general y pautas de reclutamiento*, Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 1996.
- PARSONS, Talcott, *El sistema social*, Madrid, Revista de Occidente, 1966.
- *La estructura de la acción social*, Madrid, Guadarrama, 1968.
- PASAMAR, Gonzalo y PEIRÓ MARTÍN, Ignacio, *Historiografía y práctica social en España*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1987.
- “Formas tradicionales y formas modernas de la «Historia del Presente””, *Historia Social*, nº 62, (2008), pp. 147-169
- PASCALLON, Pierre, *Le système Monétaire International*, Paris, Les Editions de l'épargne, 1992.
- PASCUAL, Marta y SARABIA, José Mª, “Factores determinantes de la distribución personal de la renta: un estudio empírico a partir del PHOGUE””, *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 15, (2004).
- PASCUAL ACOSTA, Antonio, MARTÍNEZ ALMÉCIJA, Alfredo y MUÑOZ GARCÍA, Joaquín (eds.), *Tamaño de muestra y precisión estadística*, Almería, Universidad de Almería, 2004.
- PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS, Henar, “Reconversión y reestructuración industrial en Asturias”, *Eria*, nº 28, (1992), pp. 151-164.

- *Reconversión y reindustrialización en España. Los nuevos dinamismos espaciales*, Valladolid, Secretariado de Publicaciones Universidad, 1993.
- PASINETTI, Luigi L. y SCHEFOLD, Bertram, *The impact of Keynes on economics in the 20th century*, Cheltenham, E. Elgar, 1999.
- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, *El PCE informa. El Estatuto de los Trabajadores. Debate en el Congreso*, Madrid, Comisión de Propaganda del PCE, 1979.
- *Una alternativa a la crisis. Las propuestas del PCE*, Barcelona, Planeta, 1985.
- PASTURE, Patrick, VERBERCKMOES, Johan y DE WITTE, Hans (eds.), *The Lost Perspective? Trade Unions Between Ideology and Social Action in the New Europe*, II vols., Aldershot, Brookfield / Avebury, 1996.
- PATERSON, William E. y THOMAS, Alastair J. (eds.), *The future of social democracy: problems and prospects of social democratic parties in Western Europe*, Oxford, Clarendon Press, 1986.
- PATRICIO SÁIZ, J., "Investigación y desarrollo: patentes" en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2ª ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 835-872.
- PAZ, Javier de, "La juventud de los años 80" en PSOE-CEF-Secretaría de Participación Ciudadana, *Un proyecto de futuro para la juventud. Conferencia socialista: Madrid, 12, 13, 14 diciembre 1985*, Madrid, PSOE / Secretaría de Participación Ciudadana, 1985.
- PECES-BARBA, Gregorio, *La democracia en España. Experiencias y reflexiones*, Madrid, Temas de Hoy, 1996.
- PECK, Jamie, *Constructions of neoliberal reason*, Oxford, Oxford University Press, 2010.
- PECOURT, Juan, *Los intelectuales y la transición política: un estudio del campo de las revistas políticas en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008.
- PEDREÑO MUÑOZ, Andrés (dir.) y MONFORT MIR, Vicente M. (coord.), *Introducción a la economía del turismo en España*, Madrid, Civitas, 1996.
- PEET, Richard, *La maldita trinidad: El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio*, Pamplona, Laetoli, 2004.
- PEIRÓ MARTÍN, Ignacio (ed.), *La(s) Responsabilidad(es) del Historiador*. Dossier monográfico, *Alcores. Revista de Historia Contemporánea*, nº 1, (2006).
- PELLISTRANDI, Benoît (comp.), *La historiografía francesa del siglo XX y su acogida en España: coloquio internacional (noviembre de 1999)*, Madrid, Casa Velázquez, 2002.
- PEÑA ALONSO, José Luis, *Las adquisiciones por herencia y donación sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales / Marcial Pons, 1992.
- PEÑA LOROÑO, Mª Nieves y FERNÁNDEZ SIMANCAS, Mercedes, "Estudio de costes de accidentes", *Prevención, Trabajo y Salud*, nº 37, (2006), pp. 12-23.
- PEÑARANDA, José Mª de, *Desde el corazón del CESID*, Barcelona, Espasa, 2012.
- PERACCHI, Franco y JIMÉNEZ MARTÍN, Sergi, "La calidad de la EPA en la estimación de transiciones en el mercado de trabajo", *Ekomiáz: Revista vasca de economía*, nº 43, (1999), pp. 158-197.
- PEREIRA, Luis Carlos, MARAVALL, José Mª y PRZEWORSKI, Adam, *Economic Reforms in New Democracies. A social-Democratic Approach*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
- PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos (coord.), *Historia de las relaciones internacionales contemporáneas*, Barcelona, Ariel, 2001.
- PÉREZ, Francisco, GOERLICH, Francisco José y MAS, Matilde, *Capitalización y crecimiento en España y sus regiones, 1955-1995*, Bilbao, Fundación BBV, 1995.
- MAUDOS, Joaquín y PASTOR, José Manuel, *Sector bancario español (1985-1997): cambio estructural y competencia*, Alicante, Cajas de Ahorros del Mediterráneo, 1990.
- PÉREZ, Sofía A., *Banking of Privilege. The Politics of Spanish Financial Reform*, Ithaca, Cornell University Press, 1987.

PÉREZ-BUSTAMANTE, Juan Pablo y CUBO MAYO, Ángel, “Prevención de riesgos laborales: una mirada a Europa”, *Información Laboral. Legislación y convenios colectivos*, nº 20, (2007), pp. 2-7.

PÉREZ de AYALA, José Luis, “La distinción entre los impuestos directos en virtud de sus diversos efectos de «percusión» y «sustitución»”, *Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública*, vol. XXIX, nº 200, (1989), pp. 285-296.

PÉREZ de los COBOS, Francisco (dir.) y THIBAUT ARANDA, Javier (coord.), *Ley de Prevención de Riesgos Laborales: comentada y con jurisprudencia*, Madrid, La Ley, 2008.

PÉREZ BARBERO, P., “Problemática de los principales costes de reconversión industrial”, *Impuestos*, nº 2, (1987), pp. 149-154.

PÉREZ CAMARERO, Santiago, “El suicidio adolescente y juvenil en España” en *La salud mental de las personas jóvenes en España*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 84, (2009), pp. 126-142.

- HIDALGO VEGA, Álvaro y CALDERÓN, Mª José, *La economía de las personas jóvenes*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2006
- CALDERÓN, Mª José, HIDALGO VERA, Álvaro y IVANOVA, Alexandra, “Efectos de la crisis económica sobre la juventud”, *Documento de Trabajo del Instituto Max Weber*, noviembre 2010 [www.imv.es].

PÉREZ CAMPANERO, Juan A., “La pérdida de credibilidad de la economía española”, *Libro Marrón. Círculo de Empresarios*, nº 1, (1992), pp. 267-292.

PÉREZ DÍAZ, Santiago, “La transición de Marcelino Camacho” en JULIÁ, Santos, PRADERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la transición*, Madrid, Taurus, 1996, pp. 644-646.

PÉREZ DÍAZ, Víctor, “Orientaciones políticas de los obreros españoles hoy”, *Sistema*, nº 29-30, (1979), pp. 159-180.

- *Clase obrera, partidos y sindicatos*, Madrid, Instituto Nacional de Industria, 1980.
- “Los empresarios y la clase política”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), pp. 2-37
- *El retorno de la sociedad civil. Respuestas sociales a la transición política, la crisis económica y los cambios culturales de España, 1975-1985*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987.
- “La emergencia de la España democrática: la «invención» de una tradición y la dudosa institucionalización de una democracia”, *Estudios/Working Papers del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones*, nº 18, (1991).
- *La primacía de la sociedad civil. El proceso de formación de la España democrática*, Madrid, Alianza, 1993.
- *España puesta a prueba, 1976-1996*, Madrid, Alianza, 1996.
- CHULIÁ, Elisa y ALVAREZ-MIRANDA, Berta, *Familia y sistema de bienestar: la experiencia española con el paro, las pensiones, la sanidad y la educación*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1998.
- *La cultura de la ciencia y la convergencia de España con los países avanzados*, Madrid, Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, 2006.

PÉREZ DOMÍNGUEZ, Carlos A., “El sistema de relaciones laborales en España: una revisión de la historia reciente”, *Anales de estudios económicos y empresariales*, nº 9, (1994), p. 280.

- *Los salarios en España durante la década de los ochenta: un análisis de su evolución*, Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 1997.

PÉREZ FUENTES, Pilar, “Women in the Workplace in Nineteenth and Twentieth-Century Spain: Methodological Considerations” en PIQUERAS, Juan Antonio y SANZ, Vicent (eds.), *A social history of Spanish Labour: new perspectives on class, politics and gender*, New York, Berghahn Books, 2007, pp. 43-63.

PÉREZ GARCÍA, Francisco, “Inversión en infraestructuras y convergencia de las regiones españolas”, *Economistas*, vol. X, nº 54, (1992), pp. 84-90.

- “El crecimiento del capital de la economía española”, *Papeles de Economía Española*, vol. I, nº 100, (2004), pp. 31-41.

PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, “Cuestiones de Historia Social en la estela de Tuñón de Lara” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de Lara, diez años después. La huella de un legado*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 30 (2008), pp. 23-41.

- “Expansión y retos de la historia social” en *¿Qué entendemos hoy por historia social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp. 201-206.

PÉREZ HERRERO, Pedro y RUIZ, José Juan, “La economía española ante la década de los noventa: expectativas de futuro y lecciones del pasado”, *Información Comercial Española*, nº 676-677, (1989-1990), pp. 71-97.

PÉREZ INFANTE, José Ignacio, “Costes laborales y competitividad de la economía española” en *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25-26, (1994), pp. 204-234.

- “Análisis económico de la financiación de la Seguridad Social española”, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 38, (1997), pp. 190-237.
- “La medición del desempleo en España: la EPA y el paro registrado”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 21, (2000), pp. 15-58
- *Las estadísticas del mercado de trabajo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo, 2006.
- “¿Por qué el paro registrado supera al paro de la EPA?”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 71, (2008), pp. 53-65.
- “Negociación colectiva y salarios. Aspectos metodológicos, evolución y situación actual”, *Arxius*, nº 18, (2008), pp. 55-74.
- “La concertación y el diálogo social en España: 1977-2007”, *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, nº81, (2009), pp. 41-70.

PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Historia del movimiento obrero. Viejas fuentes, nueva metodología”, *Studia Historica*, vols. VI-VII, (1988-1989), pp. 7-15.

- “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en CRUZ, Rafael y id. (eds.), *Cultura y movilización en la España contemporánea*, Madrid, Alianza, 1998, pp. 201-233.
- “«Nuevos» y «viejos» movimientos sociales en la transición” en MOLINERO, Carme (ed.), *La transición, treinta años después*, Barcelona, Península, 2006, pp. 117-151.
- “The Formation of the Working Class: A Cultural Creation” en PIQUERAS, Juan Antonio y SANZ, Vicent (eds.), *A social history of Spanish Labour: new perspectives on class, politics and gender*, New York, Berghahn Books, 2007, pp. 19-42.
- (dir.), *De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
- “El lenguaje de la ciudadanía en la España contemporánea” en id. (dir.), *De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 445-481
- (ed.), *Las izquierdas en la España democrática*. Dossier monográfico, *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, nº 20, (2008).
- “Nuevas perspectivas en Historia Social (Sobre algunas publicaciones recientes)” en ARÓSTEGUI, Julio, SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (dirs.) y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.), *Manuel Tuñón de Lara, diez años después. La huella de un legado*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 30 (2008), pp. 227-248.
- SIERRA, María (eds.), *Culturas políticas: teoría e historia*, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010.

PÉREZ LÓPEZ, José Ángel, DUARTE ATOCHE, M^a Teresa y SIERRA MOLINA, Guillermo Juan, “Una visión histórica de la contabilidad nacional”, *Revista de Gestión Pública y Privada*, n° 9, (2004), pp. 233-252.

PÉREZ MATEOS, Juan Antonio, *ABC, historia íntima del diario: cien años de ‘un vicio nacional’*, Madrid, Libro-Hobby, 2002.

PÉREZ MORENO, Salvador y ARANDA GONZÁLEZ, Juan José, “Distribución de la renta y crecimiento económico en España (1985-1995)” en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA APLICADA (ed.), *Anales de Economía Aplicada. XIV Reunión ASEPELT-España. Oviedo, 22 y 23 de junio de 2000*, [CD-ROM].

- “El estudio de la pobreza en España desde una óptica económica: medidas y políticas”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. XXVII, n° 2, (2007), pp. 349-372.

PÉREZ PÉREZ, José Antonio, *Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.

- (coord.), *Desarrollismo, dictadura y cambios sociales*. Dossier monográfico *Historia Contemporánea*, n° 26, (2003), pp. 99-127.
- “Una sociedad en transformación” en YSÀS, Pere (ed.), *La época socialista: Política y Sociedad (1982-1996)*. Dossier monográfico, Ayer, n° 84, (2011), pp. 99-127.

PÉREZ PRADO, Daniel, *Los instrumentos económicos del fomento del empleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.

PÉREZ QUINTANA, Vicente y SÁNCHEZ LEÓN, Pablo (eds.), *Memoria ciudadana y movimiento vecinal: Madrid, 1968-2008*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008.

PÉREZ REY, Joaquín, *Estabilidad en el empleo*, Madrid, Trotta, 2004.

PÉREZ SERRANO, Julio, “La Transición a la democracia como modelo analítico para la historia del presente: un balance crítico” en QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael (coord.), *Historia de la Transición en España: los inicios del proceso democratizador*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 61-76.

PÉREZ SIMARRO, Ramón y LAFUENTE FÉLEZ, José M^a, “Balance y perspectivas de las ZUR”, *Papeles de Economía Española*, n° 35, (1988), pp. 219-234.

PERROTE, Isabel, “Redistribución en la imposición sobre la renta personal: el caso español” en *XIV Encuentro de Economía Pública: políticas públicas y reformas fiscales*, Santander, 2007, pp. 18 y 19.

PETRAS, James *La socialdemocracia del Sur de Europa*, Madrid, Revolución, 1984.

- *La nueva clase media: ¿parte del problema o parte de la solución?*, s/l, s/ed., 1984.
- y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español, camino de Marbella (y dos artículos sobre los problemas de la transición al socialismo)*, Madrid, Revolución, 1990.
- “El socialismo, camino de Marbella” en id. y CARROLL-SEGUIN, Rita, *El socialismo español, camino de Marbella (y dos artículos sobre los problemas de la transición al socialismo)*, Madrid, Revolución, 1990, pp. 11-62.
- “Spanish Socialism: The Politics of Neoliberalism” en KURTH, James y id. (eds.), *Mediterranean Paradoxes. Politics and Social Structure in Southern Europe*, Oxford, Berg Publishers, 1993, pp. 95-127.
- *La historia interminable: sobre democracia, mercado y revolución*, Tafalla (Navarra), Txalaparta, 1994.
- y GIORDANO, Eduardo, *Conversaciones con James Petras: la izquierda antes y después de la caída del muro*, Barcelona, Hacer, 1995.
- “Informe. ¿Qué ha pasado en España?”, *Ajoblanco*, n° 29, (marzo 1996), pp. 41-56.
- “Informe Petras: Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles”, *Ajoblanco*, n° 3 [número especial], (verano 1996), pp. 16-82

- *Trece años de Felipe González (Informe ocultado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas)*, Madrid, Movimiento Cultural Cristiano, 1996.
 - *El Informe Petras [y otros ensayos]*, Hondarribia, Hiru, 2000.
 - CAVALUZZI, Todd, MORLEY, Morris y VIEUX, Steve, *La izquierda contraataca: conflicto de clases en América Latina en la era del neoliberalismo*, Madrid, Akal, 2000.
 - *El informe Petras. Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles*, [s/l] [s/ed.] [s/f] [www.cgt/es].
 - *Escribiendo historias*, Tafalla (Navarra), Txalaparta, 2000.
 - *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*, Halifax, N.S., Fernwood Pub. 2001.
 - VELMEYER, Henry, *El imperialismo en el siglo XXI: la globalización desenmascarada*, Madrid, Editorial Popular, 2002.
 - y id., *A System in Crisis: The dynamics of free market capitalism*, Halifax, N.S., Fernwood Pub, 2003.
 - *El sistema en crisis: dinámica del capitalismo de libre mercado*, Madrid, Editorial Popular, 2004.
 - *Zionism, Militarism and the Decline of US Power*, Atlanta, Clarity Press, 2008.
 - *Economía política del imperialismo contemporáneo*, Madrid, Maia, 2009.
- PEYDRO CARO, Miguel, *Las escisiones del PSOE y los intentos de reunificación*, Barcelona, Plaza & Janés, 1980.
- PFALLER, Alfred, GOUGH, Ian y THERBORN, Göran (comps.), *Competitividad económica y Estado de Bienestar: estudio comparativo de cinco países avanzados*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1993.
- PICCHIO, Antonella, *Social reproduction: the political economy of the labour market*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- PICO i JONJOY, Joan, *Los límites de la socialdemocracia europea*, Madrid, Siglo XXI, 1992.
- “El principio de buena fe procesal y su fundamento constitucional”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, nº 18, (2005), pp. 15-40.
- PIEDRAFITA, Sonia, STEINBERG, Federico y TORREBLANCA, José Ignacio, *20 años de España en la Unión Europea (1986-2006)*, Madrid, Real Instituto Elcano / Parlamentario Europeo-Oficina de España, 2006.
- PIERSON, Paul, *Dismantling the Welfare State. Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
- PINA GONZÁLEZ, Arturo, “Treinta años de informes de la OCDE sobre la economía española”, *Información Comercial Española*, nº 676/677, (1989-1990), pp. 131-149.
- PINOL, Jean-Luc, *Histoire de l'Europe Urbaine*, vol. II, *de l'Ancien Régime à nos jours*, Paris, Seuil, 2003.
- PINTO-DUSCHINSKY, Michael, “Foreign political aid: German political foundations and their US counterparts”, *International Affairs*, vol. LXVII, nº 1, (1991), pp. 33-63.
- PINTO RODRÍGUEZ, Mª Elena, *Suicidio juvenil. Sociología de una nueva realidad social*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006.
- PÍÑOL, Josep M., *La transición democrática de la Iglesia española*, Madrid, Trotta, 1999.
- PIORE, Michel y SABEL, Charles, *The Second Industrial Divide: Possibilities for prosperity*, New York, Basic Books, 1984.
- *Paro e inflación. Perspectivas institucionales y estructurales*, Madrid, Alianza, 1983.
 - *La segunda ruptura industrial*, Madrid, Alianza, 1990.

- "Flexible Specialisation and the Re-emergence of Regional Economies" en HIRST, Paul y ZEITLIN, Jhonathan (comps.), *Reversing Industrial Decline?* Oxford, Berg Publishers, 1989.
- PIQUERAS, José Antonio, "El abuso del método, un asalto a la teoría" en CASTILLO, Santiago (coord.), *La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas [Actas del I Congreso de la Asociación de Historia Social, Zaragoza, 1990]*, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 87-110.
- "La práctica editorial de *Historia Social*", *Revista del Centro de Investigaciones Históricas*, nº 12-13, (2001), pp. 93-108.
- SANZ, Vicent, "The social History of Work in Spain: From the Primitive Accumulation of Knowledge to Offshoring", *International Review of Social History*, vol. L, nº 3, (2005), pp. 467-483.
- "El dilema de Robinson y las tribulaciones de los historiadores sociales" en *Formas de hacer historia Social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp. 59-90.
- *Cánovas y la derecha española: del magnicidio a los neocon*, Barcelona, Península, 2008.
- PLAZA HIDALGO, Isabel y MELLE HERNÁNDEZ, Mónica, "La relación entre la estructura organizativa, estrategia y resultados en el Grupo Argentaria", *Papeles de Economía Española*, nº 58, (1994), pp. 276-283.
- POIRRIER, Philippe (ed.), *La historia cultural. ¿Un giro historiográfico mundial?* Valencia, Publicacions Universitat de Valencia, 2012.
- PONS, Jerónima, FLORENCIO PUNTAS, Antonio y ARENAS POSADAS, Carlos (eds.), *Trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea*, Sevilla, Mergablum, 2001.
- PONT MESTRES, Magín, "Justificación y alcance de la nueva Ley 18/1991 del IRPF a tenor de su Preámbulo", *Revista Técnica Tributaria*, nº 4, (1991), p. 11.
- PONZ, Juan Miguel y TAGUAS, David, "Temporalidad y tasa de cobertura del desempleo en la economía española", *Documento de Trabajo. Ministerio de Economía y Hacienda*, nº D-95001, (1995).
- POOVEY, Mary, "The social constitution of «class»: toward a history of classificatory thinking" en DIMOCK, Wai-chee y GILMORE, Michael T. (eds.), *Rethinking class: literary studies and social formations*, New York, Columbia University Press, 1994, pp. 14-56.
- PORRAS SÁNCHEZ, Manuel y RUFIÁN LIZÁN, Antonio, "La Encuesta de Población Activa: aspectos metodológicos", *Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, nº 1, (1996), pp. 113-116.
- PORTELLI, Hugues, *Gramsci y el bloque histórico*, Madrid, Siglo XXI, 1978.
- POSTER, Mark, *Critical Theory and Poststructuralism: In Search of a Context*, London, Cornell University Press, 1989.
- POSTONE, Moishe, *Time, labor and social domination. A reinterpretation of Marx's critical theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 [1993].
- *Tiempo, trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica de Marx*, Madrid, Marcial Pons, 2006.
- POULANTZAS, Nicos, *La crisis de las dictaduras: Portugal, Grecia, España*, Madrid, Siglo XXI, 1976.
- *Las clases sociales en el capitalismo actual*, México, Siglo XXI, 1977.
- POWELL, Charles, (ed.), *Las primeras elecciones democráticas veinte años después*, Madrid, Congreso de los Diputados, 1998.
- *España en democracia, 1975-2000*, Barcelona, Debolsillo, 2002 [2001].
- "Leopoldo Calvo Sotelo: corrigiendo el rumbo de una democracia amenazada", *Revista de Occidente*, nº 336, (2009), p. 41-58.
- PRADA RODRÍGUEZ, Julio, *La España masacrada: la represión franquista de guerra y posguerra*, Madrid, Alianza, 2010.

PRADOS de la ESCOSURA, Leandro, “La historia cuantitativa en España: nota sobre el Seminario de Historia Cuantitativa, celebrado en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1983”, *Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic History*, vol. II, nº 1, (1984), pp. 169-176.

- ZAMAGNI, Vera (eds.), *El desarrollo económico en la Europa del Sur: España e Italia en perspectiva histórica*, Madrid, Alianza, 1992.

- *El progreso económico de España (1850-2000)*, Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

PRADOS de REYES, Francisco Javier, “Contratos y relación de trabajo” en RODRÍGUEZ-SAÑUDO, Fermín y ELORZA GUERERO, Fernando, *Veinte años de jurisprudencia laboral y social del Tribunal Constitucional (XIX Jornadas Universitarias Andaluzas del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)*, Madrid, Tecnos, 2001, pp. 172-262.

PREGO, Victoria, *Felipe González: el presidente del cambio (1982-1996)*, Madrid, Unidad, 2002.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, *Los Pactos de la Moncloa. Texto completo del acuerdo económico y del acuerdo político*, 2ª ed., Madrid, Servicio Central de Publicaciones Secretaría General Técnica Presidencia del Gobierno, 1977.

PRESTON, Paul, “Recientes estudios de historia del movimiento obrero español”, *Sistema*, nº 106, (1993), pp. 109-144.

- *El holocausto español: odio y exterminio en la Guerra Civil y después*, Barcelona, Debate, 2011.

PRIDHAM, Geoffrey, “Southern European socialist and the state: consolidation of party rule or consolidation of democracy?” en GALLAGHER, Tom y WILLIAMS, Allan M. (eds.), *Southern European socialist. Parties, elections and the challenge of government*, Manchester, Manchester University Press, 1989, pp. 132-162.

PRIETO JANO, Mª José, “Medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias: Las amnistías fiscales”, *Anuales de Estudios Económicos y Empresariales*, nº 9, (1994), pp. 219-242.

PRIETO PÉREZ, Eugenio, “El problema de la acumulación de la deuda pública”, *Análisis Financiero*, nº 69, (1996), pp. 78-96.

PRZEWORSKI, Adam, *Capitalismo y socialdemocracia*, Madrid, Alianza, 1988

PSOE, *Conferencia de los Partidos Socialistas de Europa del Sur*, Madrid, PSOE, 1976.

- *Manifiesto electoral del PSOE*, Madrid, 1977.

- *Segunda Conferencia de los Partidos Socialistas del Sur de Europa*, Madrid, PSOE, 1977.

- *Programa electoral del PSOE. Elecciones 1977*, Madrid, PSOE, 1977.

- CE, *Normas para interventores de mesas electorales*, Madrid, PSOE, 1977.

- *Programa Elecciones 79*, Madrid, PSOE, 1979.

- *Por el cambio. Programa electoral*, Madrid, PSOE, 1982.

- SECRETARÍA DE IMAGEN, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ELECTORALES, “Encuesta post-electoral de 1982”, Madrid, PSOE, Secretaría de Imagen / Departamento de Estudios Electorales, 1982.

- *Hacia el cambio... 100 días en el Gobierno*, Madrid, PSOE, 1983.

- *Libro del militante*, Madrid, PSOE, 1983.

- EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *Un año para la esperanza: 365 días de gobierno socialista*, Madrid, PSOE, 1983.

- *Documento sobre índices de representación de mujeres socialistas*, Madrid, PSOE / Secretaría de la Mujeres, 1985.

- *España ante el reto de Europa*, Madrid, PSOE, 1985.

- CEF-Secretaría de Participación Ciudadana, *Un proyecto de futuro para la juventud. Conferencia socialista: Madrid, 12, 13, 14 diciembre 1985*, Madrid, PSOE / Secretaría de Participación Ciudadana, 1985.
- EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *España, compromiso de solidaridad: resoluciones socialistas para los años 80*, Madrid, PSOE / Equipo de Documentación Política, 1985.
- *Política sanitaria en atención primaria de salud*, Madrid, PSOE, 1986.
- *Cuatro años cumplidos. España, a punto 1982/1986*, Madrid, PSOE, 1986.
- CEF, Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales, *La política económica de los socialistas. Balance de un ajuste solidario*, Madrid, PSOE, 1986.
- . EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, *1982/1986, balance de gestión*, Madrid, PSOE / Equipo de Documentación Política, 1986.
- *La participación de las mujeres en el PSOE y en las Instituciones Públicas*, Madrid, PSOE / Secretaría de Igualdad, 2002.

PRADERA, Javier, “Las pasiones del poder: el PSOE tras diez años de Gobierno” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista: el ocaso de Felipe González*, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp. 254-283.

- “El doble lamento. La opinión pública ante el Estado del Bienestar”, *Claves de Razón Práctica*, nº 50, (1995), pp. 40-49.

PRECARIAS A LA DERIVA, *A la deriva: por los circuitos de la precariedad femenina: precarias a la deriva*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004.

PRIETO, Carlos, “Políticas de mano de obra en las empresas españolas”, *Sociología del Trabajo*, nº 6, (1989), pp. 33-50.

- (dir. / coord.), *Los trabajadores y sus condiciones de trabajo*, Madrid, HOAC, 1994.
- “Crisis del empleo: ¿Crisis del orden social?” en MIGUÉLEZ Faustino y id. (coords.), *Las relaciones de empleo en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 529-548.
- “Homenaje a Andrés Bilbao”, *Cuaderno de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XX, nº 2, (2002), pp. 259-263.
- “La degradación del empleo o la norma social del empleo flexibilizado”, *Sistema*, nº 168-169, (2002), pp. 89-106.
- (ed.), *Trabajo, género y tiempo social*, Madrid / Barcelona, Editorial Complutense / Editorial Hacer, 2007.
- (coord.), *La calidad del empleo en España: una aproximación teórica y empírica*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009.
- “La centralidad social del trabajo y del empleo: un debate más político que técnico” RUESGA BENITO, Miguel y RESA NESTARES, Carlos (eds.) y FERRER SAIS, Antonio (coord.), *Anuario de relaciones laborales en España*, Madrid, Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 2010, vol. 1, pp. 125-127.

PRIETO LACACI, Rafael, *La participación social y política de los jóvenes*, vol. V, dentro de ZARRAGA, José Luis (dir.), *Informe Juventud de España 1985. La inserción de los jóvenes en la sociedad*, VII vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 1985.

PRO RUIZ, Juan, “Sujetos con poder en la España contemporánea” en RIVERA, Antonio, ORTIZ DE ORRUÑO, José Mª y UGARTE, Javier (eds.), *Movimientos sociales en la España Contemporánea*, Madrid, Instituto Universitario de Historia Social / Asociación de Historia Contemporánea / Abada, 2008, pp. 65-81.

PROST, Antoine, *Doce lecciones sobre la historia*, Madrid, Cátedra, 2001 [*Douze leçons sur l'histoire*, Paris, Editions du Seuil, 1996].

PUHLE, Hans-Jürgen, “El PSOE: un partido predominante y heterogéneo” en LINZ, Juan José y MONTERO, José Ramón (eds.), *Crisis y cambio: Electores y partidos en la España de los años ochenta*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp. 291-344.

PUJOL, Jordi, *Memòries (1930-1980): història d'una convicció*, Barcelona, Proa, 2007.

- *Memorias II (1980-1983): tiempo de construir*, Barcelona, Destino, 2009.

PURCALLA BONILLA, Miguel Ángel, *Autonomía colectiva y prevención de riesgos laborales*, Madrid, IBIDEM, 1998.

PUTTASWAMAIAH, K. (ed.), *Milton Friedman: Nobel Monetary Economist. A review of his theories and policies*, New York, Isle Publishing Company, 2009.

PYE, Lucian W., “Political Science and the Crisis of Authoritarianism”, *American Political Science Review*, nº 84, (1990), pp. 3-19.

QUEISSER, Monika y WHITEHOUSE, Edward, “Comparación de las promesas de pensión de treinta países de la OCDE”, *Revista Internacional de Seguridad Social*, vol. LIX, nº 3, (2006), pp. 53-84.

QUEROL BELLIDO, Vicente, “Hacia un nuevo modelo presupuestario: Los Presupuestos Generales del Estado para 1984”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 18, (1993), pp. 133-150.

QUEROL GARCÍA, Mª Teresa, *Cuestiones procesales en la nueva regulación de los delitos contra la Hacienda Pública*, Madrid, Información y Documentación Tributaria, 1987.

QUESADA SEGURA, Rosa, *Los principios constitucionales y el modelo legal de protección por desempleo*, Sevilla, Mergablum, 2004.

- (coord.), *Lecciones de derecho del trabajo*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994.

QUEVEDO, Francisco, *Pasión por la libertad: el pensamiento político de Adolfo Suárez*, Barcelona, Altera, 2007.

QUINTANA, Francisco (coord.), *Asalto a la fábrica. Luchas autónomas y reestructuración capitalista (1960-1990)*, Barcelona, Alikornio, 2000.

QUINTANA PAZ, Nuria, *Televisión y prensa durante la UCD: premios y castigos mediático-gubernamentales*, Madrid, Fragua, 2007.

QUINTANILLA FISAC, Miguel Ángel, “El sistema español de Ciencia y Tecnología y la política I+D”, *Arbor*, nº 554-555, (1992), pp. 9-30.

- MALTRÁS, Bruno, “La estructura de producción científica en España (1981-1989) y las prioridades del Plan Nacional”, *Arbor*, nº 554-555, (1992), pp. 107-132.

QUIROSA-CHEYROUZE y MUÑOZ, Rafael (ed.), *La sociedad española en la Transición: los movimientos sociales en el proceso democratizador*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.

RABADÁN MOSSERAY, Isabel, “Redistribución y flexibilidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España: un ejercicio de simulación del impuesto lineal” en ONRUBIA FERNÁNDEZ, Jorge y SANZ SANZ, José Félix (dirs.), *Redistribución y bienestar a través de la imposición sobre la renta personal*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2003, pp. 217-246.

RABINBACH, Anson, “Racionalismo y utopía como lenguajes de la naturaleza: una nota” en *Historia Social*, nº 4, (1989), pp. 119-126.

RACIONERO, Luis, *Del paro al ocio*, 7ª ed., Barcelona, Anagrama, 1984.

RADCLIFF, Pamela Beth, *Making democratic citizens in Spain: civil society and the popular origins of the Transition, 1960-78*, London, Palgrave, 2011.

RAE, Douglas y RAMÍREZ, Victoriano, *El sistema electoral español: quince años de experiencia*, Madrid, McGraw-Hill, 1993.

RAMÍREZ, Pedro J., *Así se ganaron las elecciones*, Barcelona, Planeta, 1977.

- *Así se ganaron las elecciones de 1979*, Madrid, Prensa Española, 1979.

- *David contra Goliath: jaque mate al felipismo*, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

RAMÍREZ RODRIGO, Luis Néstor, "Infracciones y sanciones en seguridad e higiene en el trabajo: consideraciones a la Ley 8/1988 sobre Infracciones y Sanciones administrativas en el Orden Social", *Salud y Trabajo*, nº 71, (1989), pp. 22-27.

RAMONET, Ignacio, *La catástrofe perfecta: crisis de siglo y refundación del porvenir*, Madrid, Público, 2010.

RAMOS, Antonio (ed.), *España Hoy. Sociedad*, Madrid, Cátedra, 1991,

RAMOS CARVAJAL, Carmen y FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Esteban, "Fuentes de Información Estadística del Mercado Laboral", *Documento de Trabajo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oviedo*, nº 240, (2001).

RAMOS GASCÓN Antonio (ed.), *España Hoy*, II vols., Madrid, Cátedra, 1991, vol. I, *La sociedad*.

RAMOS PALOMO, Dolores, "La historia social contemporánea en España, 1975-1980 (Cenicienta y Princesa)", *Baética*, nº 15, (1993), pp. 397-406.

RATO, Rodrigo, "La confianza y la política económica: Las privatizaciones", *Información Comercial Española*, nº 772, (1998) pp. 3-7.

RAYACK, Elton, *Not So Free to Choose. The Political Economy of Milton Friedman and Ronald Reagan*, New York, Praeger, 1989.

RAYMOND BARA, José Luis, GARCÍA VILLAR, Jaume y POLO ANDRÉS, Clemente, "Empleo e inversión en la economía española: 1955-1984", *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 200-216.

- "Tipos impositivos y evasión fiscal en España: un análisis empírico", *Papeles de Economía Española*, nº 30-31, (1987), pp. 154-169.
- PALET, José, "Factores determinantes de los tipos reales de interés en España", *Papeles de Economía Española*, nº 43, (1990), pp. 144-160.
- "El ahorro en la economía española", *Papeles de Economía Española*, nº 47, (1992), pp. 155-172.
- "La estructura productiva de la economía española y su evolución", *Papeles de Economía Española*, nº 50, (1992), pp. 2-20.
- "El problema de la sostenibilidad de la deuda pública", *Perspectivas del Sistema Financiero*, nº 56, (1994), pp. 119-121.
- "El carácter estructural del déficit presupuestario", *Papeles de Economía Española*, nº 68, (1996), pp. 192-197.
- MAULEÓN TORRES, Ignacio, "Ahorro y tipos de interés en los países de la Unión Europea", *Papeles de Economía Española*, nº 70, (1997), pp. 196-214.
- ROIG SABATÉ, José Luis, "La dotación de capital humano en la economía española", *Información Comercial Española*, nº 829, (2006), pp. 67-91.

RAYÓN SUÁREZ, Enrique (ed.), *Reconversión y reindustrialización: normas legales*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.

REAGAN, Ronald, *¿Una revolución conservadora?* Barcelona, Planeta, 1981.

- *Una vida americana*, Barcelona, Plaza y Janés / Cambio 16, 1991.

REBOLLO AREVALO, Alfonso, *La estructura del consumo en España*, 2ª ed. amp. y rev., Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo / Instituto Nacional de Consumo, 2001.

REBOLLO SANZ, Yolanda, *Influencia de la contratación temporal y las prestaciones por desempleo en el mercado laboral*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2008.

RECALDE, José Ramón, *Integración y lucha de clases en el neocapitalismo*, Madrid, Ciencia Nueva, 1968.

RECIO, Albert, "Economía sumergida y transformación de las relaciones laborales en España", *Papers*, nº 27, (1986), pp. 131-154.

- *Capitalismo y formas de contratación laboral*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.
 - “Flexibilidad laboral y desempleo en España (reflexiones al filo de la reforma laboral”, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, nº 5, (1994), pp. 57-74.
 - OFFE, Claus y GORZ, André, *El paro y el empleo: enfoques alternativos*, Valencia Germania, 1997.
 - “La segmentación del mercado de trabajo en España” en intervención normativa del Estado en materia de relaciones colectivas” en MIGUÉLEZ, Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones laborales en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999 [1991], pp. 97-115
 - ROCA, Jordi, “The Spanish Socialist in Power: Thirteen Years of Economic Policy” en GLYN, Andrew (ed.), *Social Democracy in Neoliberal Times. The Left and Economic Policy since 1980*, New York, Oxford University Press, 2001, pp. 173-199.
 - “Paro, precarización laboral e ideologías económicas”, *Sistema*, nº 168-169, (2002), pp. 53-69.
 - “¿Qué fue de la clase obrera?”, *Mientras Tanto*, nº 93, (2004), pp. 25-43.
 - “Notas sobre el modelo de empleo español”, *Gaceta Sindical*, nº 5, (2005), pp. 77-100.
 - “Capitalismo español: La inevitable crisis de un modelo insostenible”, *Revista de Economía Crítica*, nº 9, (2010), pp. 198-222.
- RECIO MARTÍNEZ, Joaquín (coord.), *Diego Cañamero, el hombre con los pies en la tierra*, Sevilla, Atrapasueños, 2010.
- REDERO SAN ROMÁN, Manuel (ed.), *La transición a la democracia en España*. Dossier monográfico *Ayer*, nº 15, (1994).
- (ed.), *La Unión General de Trabajadores en Castilla y León (1988-1998). Historia de un compromiso social*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004.
 - “Los sindicatos en la democracia: de la movilización a la gestión” en PÉREZ LEDESMA, Manuel (ed.), *Las izquierdas en la España democrática*. Dossier monográfico, *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, nº 20, (2008), pp. 129-158
- REDONDO, Nicolás, “Modernidad y progreso social”, *Leviatán*, nº 25, (1986), pp. 5-16.
- “Desde el 30º Congreso al Estatuto de los Trabajadores” en, SARACÍBAR, Antón [et al.], *25 años del Estatuto de los Trabajadores (1980-2005)*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2005, pp. 80-89.
- REID, Donald, “Reflections on Labor History and Language” en BERLANSTEIN, Lenard R. (ed.), *Rethinking Labor History. Essays on discourse and class analysis*, Urbana, University of Illinois Press, 1993, pp. 39-54.
- REIG, RAMÓN, *Medios de comunicación y poder en España: prensa, radio, televisión y mundo editorial*, Barcelona, Paidós, 1998.
- REGINI, Marino (ed.), *The future of Labour Movements*, Newbury Park (SA), Sage, 1992.
- REQUEIJO, Jaime, *España en deuda, 1975-1995*, Madrid, McGraw-Hill, 1977.
- “Crisis económica y reforma del sistema financiero”, *Información Comercial Española*, nº 617-618, (1985), pp. 145-160.
 - *Introducción a la Balanza de Pagos en España*, Madrid, Tecnos, 1985.
 - “Lo que fuimos y lo que somos”, *Información Comercial Española*, nº 676/677, (1990), pp. 5-19.
- REMERÓ, Juan y PÉREZ, Javier, *Pobreza y desigualdad en los países en desarrollo*, Madrid, Síntesis, 1992.
- REMSHAW, Geoffrey, *Reajuste y comportamiento de la economía en los países industrializados. Una síntesis*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990.

- RENOVALES MOTA, Iñigo, SÁNCHEZ y SÁNCHEZ-AMAYA, M^a Isabel y RASINES GARCÍA, Luis Alberto, “La reordenación y reducción del tiempo de trabajo en la Unión Europea”, *Estudios de Economía Aplicada*, n° 3, (1995), pp. 153-168.
- REVEL, Jacques y LEVI, Giovanni (coords.), *Political Uses of the Past. The Recent Mediterranean Experience*, London / Portland Or, Frank Cass, 2002.
- REVELLI, Marco, *Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro*, Torino, Einaudi, 2001.
- *Más allá del siglo XX: las políticas, las ideologías y las asechanzas del trabajo*, Madrid, Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo, 2002.
- REVILLA, Juan Carlos y TOVAR, Francisco José, “El control organizacional en el siglo XXI: en busca del trabajador autodisciplinado”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n° 135, (2011), pp. 47-68.
- REX, John, *El conflicto social: un análisis conceptual y teórico*, Madrid Siglo XXI, 1985.
- REY DEL CASTILLO, Carlos M., “Los salarios y la competitividad de la economía española”, *Relaciones Laborales*, n° 1, (1991), pp. 1145-1156.
- REY GUANTER, Salvador del, *Negociación colectiva y paz laboral*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984.
- REYES, Román (ed.) y MUÑOZ, Juan (coord.), *Diccionario crítico de Ciencias Sociales*, IV vols., Madrid, Plaza y Valdés, 2009.
- RHODES, Martín (ed.), *Southern European Welfare States: between crisis and reform*, London, Frank Cass, 1997.
- RIBAS, José, *Los 70 a destajo: “Ajoblanco” y la libertad*, Barcelona, RBA, 2007.
- RICA, Sara de la, “Joaquín Almunia” en FEDEA, *25 Años de economía española. Testigos*, Madrid, FEDEA, 2011.
- RICO, Eduardo G., *Alfonso Guerra*, Barcelona, ASES, 1989.
- RICO, Guillem, *Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electoral en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009.
- RICO BELDA, Paz, “Determinantes de la estructura temporal de los tipos de interés de la deuda pública”, *Documento de Trabajo. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas*, n° 96-01, (1996).
- “Estructura temporal de los tipos de interés y crecimiento económico en España”, *Documento de Trabajo. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas*, n° WP-EC 98-28, (1998).
- “La efectividad de la política fiscal. El caso español”, *Documento de Trabajo. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas*, n° WP-EC 2000-08, (2000).
- RICOEUR, Paul, *La memoria, la historia, el olvido*, Madrid, Trotta, 2003.
- RIECHMANN, Jorge y RECIO, Albert, *Quien parte y reparte: el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo*, Barcelona, Icaria, 1997.
- RIFKIN, Jeremy, *The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*, New York, Penguin Group, 1995.
- *El fin del trabajo: el declive de la fuerza del trabajo global y el nacimiento de la era posmoderna*, Barcelona, Paidós, 1996.
- RIJNEN, Harry, “La CEOE como organización”, *Papeles de Economía Española*, n° 22, (1985), pp. 115-121.
- RIMA, Ingrid H., *Development of economics analysis*, London, Routledge, 2001.
- RÍO, Eugenio del, *¿Ha muerto la clase obrera?* Madrid, Revolución, 1989.
- RÍO, Clemente del, *La evolución de los servicios en España*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1992.

RÍO OTERO, Coral del, GAGO RODRÍGUEZ, Alberto, CANTÓ SÁNCHEZ, Olga y GRADÍN LAGO, Carlos, "La política fiscal en España durante el período 1982-1996", *Hacienda Pública Española*, n° Extra 2002, (2000), pp. 253-258.

RÍOS, César Alonso y ELORDI, Carlos, *El desafío socialista*. Barcelona, Laia, 1982.

RISQUES, Manel, "El segrest del passat: repressió franquista i oblit" en MARTÍNEZ CASTELLS, Àngels, DIGÓN, Raül y JUBERÍAS, Luis (eds.), *Ciudadanía i participació política*, Barcelona, Fundació Pere Ardiaca, 2005,

RIVASES, Jesús, *Los banqueros del PSOE*, Barcelona, Ediciones B, 1988.

- Mariano Rubio. *Los secretos del Banco de España*, Madrid, Temas de Hoy, 1991.

RIVERA, Antonio, ORTIZ DE ORRUÑO, José Mª y UGARTE, Javier (eds.), *Movimientos sociales en la España Contemporánea*, Madrid, Instituto Universitario de Historia Social / Asociación de Historia Contemporánea / Abada, 2008.

RIVERO, Jorge Mª, *El insólito matrimonio político entre Felipe González y Alfonso Guerra: teorías e historia inéditas de la bicefalia política en España*, Valladolid, Ediciones de Cámara, 1984.

ROA, Vicente, *Apoteosis y ocaso del felipismo*, [Madrid], CDN, 1993.

ROCA JUSMET, Jordi, "La distribución de la renta entre las clases sociales" en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 595-645.

- *Pacte social i política de rendes: debat internacional i experiència a l'Estat espanyol (1977-1988)*, Vic, Eumo, 1991.

- *Pactos sociales y políticas de rentas: el debate internacional y la experiencia española (1977-1988)*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

- "Evolución de los salarios y evolución del discurso «oficial» sobre los salarios" en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los ochenta*, Madrid / Barcelona, Icaria / Instituto Sindical de Estudios, 1993, pp. 197-222.

ROCA MOHEDANO, Manuela, "La Unión Sindical Obrera (USO): del nacimiento del nuevo movimiento obrero durante el franquismo a la búsqueda de espacios sindicales en la transición", *Historia del Presente*, n° 18, (2011), pp. 113-131.

ROCA, Francesc, "L'èxit del model urbà català" en *Segle XX: Revista Catalana d'Història*, n° 3, (2010), pp. 165-178.

ROCA, José Manuel (ed.), *El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992)*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994.

- *La reacción conservadora: los "nocons" y el capitalismo salvaje*, Madrid, La Linterna Sorda, 2009.

ROCHA SÁNCHEZ, Fernando, COLADO LEÓN, Auxiliadora y id., *El papel de la negociación colectiva en la regulación de la contratación temporal*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006.

- CRUCES AGUILERA, Jesús, *Cambios productivos y empleo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008.

RODGER, Richard (ed.), *European urban History. Prospect and Retrospect*, Leicester, Leicester University Press, 1993.

RODGERS, Gerry y RODGERS, Janine (comps.), *Precarious job in labour market regulation: The growth of atypical employment in Western Europe*, Genève, International Labour Organization, 1989.

- *El trabajo precario en la regulación del mercado laboral. Crecimiento del empleo atípico en Europa Occidental*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

RODRIGO ILLERA, Carlos, *Productividad, eficacia y cambio técnico en las empresas de Europa: con especial referencia a España*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2003.

RODRÍGUEZ ARAMBERRI, Julio, “El proyecto socialista y la crisis económica: reflexión sobre algunas propuestas estratégicas”, *Zona Abierta*, nº 22, (1979), pp. 25-44.

RODRÍGUEZ ARÓSTEGUI, Juan Arturo, *La política cultural del Estado de los gobiernos socialistas, 1982-1986*, Gijón, Trea, 2003.

RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar J., “La historia local y social del franquismo en la democracia, 1976-2003. Datos para una reflexión”, *Historia Social*, nº 56, (2006), pp. 153-177.

RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, “De la agonía a la agonía” en TUSELL, Javier y SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista: el ocaso de Felipe González*, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp. 51-66.

- “Carlos Solchaga Catalán” en FUENTES QUINTANA, Enrique [et al.], *La Hacienda en sus ministros. Franquismo y democracia*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, pp. 229-262.
- *25 años del Círculo de Empresarios (1977-2002)*, Madrid, Círculo de Empresarios, 2002.
- *Estado contra mercado*, Madrid, Taurus, 2008; id., *Diez ensayos liberales*, Madrid / Barcelona, LID, 2008
- *Una crisis y cinco errores*, Madrid, Lid, 2009.

RODRÍGUEZ CABALLERO, Juan Carlos, “La información estadística sobre el mercado de trabajo en España”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 71, (2008) p. 67-98.

RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, *El gasto público en servicios sociales en España (1972-1988): aproximación a su estructura, cuantificación y análisis desde la perspectiva del bienestar social a través de las asignaciones presupuestarias*, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1990.

- (comp.), *Estado, privatización y bienestar: un debate para la Europa actual*, Barcelona, Icaria, 1991.
- “Integración, asistencialización y exclusión en el Estado del Bienestar” en ALBARRACÍN, Jesús [et al.], *La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los ochenta*, Madrid / Barcelona, Icaria / Instituto Sindical de Estudios, 1993, pp. 274-275.
- “Posibilidades y límites de la idea de una Europa social”, *Revista Internacional de Filosofía Política*, nº 5, (1995), pp. 21-37.

RODRÍGUEZ DÍAZ, José Antonio, “Revisitando el poder: cambios en la estructura del poder económico (1991-2000)”, *Sistema*, nº 172, (2003), pp. 3-26.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Andrés (coord.), *Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones*, Madrid, Pirámide, 1998.

RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, José E., “Legitimación y conflicto en las sociedades industriales avanzadas”, *Sistema*, nº 29-30, (1979), pp. 103-118.

RODRÍGUEZ IBARRA, José Luis, *Rompiendo cristales: treinta años de vida política*, Barcelona, Planeta, 2008.

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis, “Los terrorismos en la crisis del franquismo y en la transición política a la democracia”, *Historia del Presente*, nº 13, (2009), pp. 133-151.

RODRÍGUEZ de MEDINA, Ignacio, *Política económica, distribución de la renta y mercado de trabajo: España, 1982-1993*, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 1996.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Emmanuel, *Autonomía y capital. Recomposición y crisis de la clase obrera como sujeto político. Madrid, Barcelona, Euskadi, Asturias (1956-1986)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2002.

- *El gobierno imposible. Trabajo y fronteras en la metrópolis de la abundancia*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2003.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Julio, “Un comentario sobre la crisis del pensamiento económico de la izquierda” en *Estado de bienestar y opciones de política económica*. Dossier monográfico, *Sistema*, nº 80-81, (1987), pp. 91-100.

- “El socialismo democrático ante el reto de la economía abierta”, *Leviatán*, nº 40, (1990), pp. 15-24.
- “El último ciclo de la economía española”, *Leviatán*, nº 50, (1992), pp. 21-30.

RODRÍGUEZ GUERRA, Jorge, *La transformación de la sociedad salarial y la centralidad del trabajo*, Madrid, Talasa, 2006.

RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, *Los trabajadores y la Constitución*, Madrid, Sociedad de Estudios Laborales, 1980.

- (coord.), *Comentarios a la nueva legislación laboral. Ley reformada del Estatuto de los Trabajadores, Ley de Protección por Desempleo y Decretos de desarrollo*, Madrid, Tecnos, 1985.
- “La contratación temporal en la Ley 32/1984 y en los decretos de desarrollo” en id. (coord.), *Comentarios a la nueva legislación laboral. Ley reformada del Estatuto de los Trabajadores, Ley de Protección por Desempleo y Decretos de desarrollo*, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 85-115.
- (coord.), *Comentarios a la Ley de Libertad Sindical: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto*, Madrid, Tecnos, 1985.
- “Negociación colectiva y acuerdos sociales”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), pp. 282-301.
- “La Ley de Relaciones Laborales, diez años después”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1986), pp. 27-32.
- “Flexibilidad: ¿un debate interesante o un debate interesado?”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1987), pp. 14-18.
- [et al.], *Negociación colectiva: presente y futuro*, Barcelona, Gestió 2000, 1989.
- “Diez años de Estatuto de los Trabajadores”, *Relaciones Laborales*, vol. I, (1990), pp. 37-44.
- “VALDÉS DAL-RÉ, Fernando y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia, “Diez años de «Relaciones Laborales»”, *Relaciones Laborales*, nº 1-2, (1996), pp. 27-32.

RODRÍGUEZ RAMOS, Mª José, “El funcionamiento de los servicios de empleo y la reforma del INEM” en QUESADA SEGURA, Rosa (coord.), *Lecciones de derecho del trabajo*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, pp. 405-456.

RODRÍGUEZ-RATA, Alexis, “La moderación sindical en la transición española: ¿interés corporativo o de clase?”, *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales*, nº 2, (2011), pp. 146-161.

RODRÍGUEZ SOSA, Vicente y ASIÁN CHAVES, Rosario, *Indicadores y fuentes estadísticas para el análisis de los mercados de trabajo*, Sevilla, Instituto de Desarrollo Regional / Fundación Universitaria, 2006.

RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, *Los Ministros en la España Democrática. Perfil, trayectorias y carrera ministerial de los miembros de gobierno de Suárez a Zapatero (1976-2005)*, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2006.

RODRÍGUEZ-SAÑUDO, Fermín y ELORZA GUERERO, Fernando, *Veinte años de jurisprudencia laboral y social del Tribunal Constitucional (XIX Jornadas Universitarias Andaluzas del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)*, Madrid, Tecnos, 2001.

RODRÍGUEZ VALDÉS, Rafael, VEGA, Rubén y VIEJO FERNÁNDEZ, Xulio (eds.), *Llingua, Clase y Sociad (actes del Seminariu ‘Llingua, Clase y Sociad’, Uviéu, 27-30 de marzu del 2006)*, Uviéu, Trabe, 2008.

ROEMER, John E., *A general theory of exploitation and class*, Cambridge, Harvard University Press, 1982.

- *Teoría general de la explotación y de las clases*, Madrid, Siglo XXI, 1989.
- (comp.), *El marxismo, una perspectiva analítica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.

ROJO DUQUE, Luis Ángel, “Desempleo y factores reales”, *Papeles de Economía Española*, nº 8, (1981), pp. 124-136.

- “La política monetaria en un proceso de «ajuste positivo»”, *Papeles de Economía Española*, nº 15, (1983), pp. 172-174.
- *Keynes, su tiempo y el nuestro*, Madrid, Alianza, 1984.
- *Ensayos de economía y pensamiento político*, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2004.
- “El camino de España hacia la Unión Monetaria Europea”, *Información Comercial Española*, nº 826, (2005), pp. 73-84.

ROLDÁN, Santiago, MUÑOZ, Juan y SERRANO, Ángel, *¿Qué es el capitalismo español?* Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977.

ROMAGNOLI, Umberto, *El derecho, el trabajo y la historia*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1997.

- “El ambiguo compromiso del Acuerdo Interconfederal italiano del 28 de junio de 2011”, *Revista de Derecho Social*, nº 55, (2011), pp. 13-24.

ROMÁN, Paloma, *El Partido Socialista Obrero Español en la transición española: organización e ideología (1975-1982)*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1986.

- “El PSOE: un partido en trayectoria circular (1977-1999)” en MONEDERO, Juan Carlos y PANIAGUA, Juan Luis (eds.), *En torno a la democracia en España: temas abiertos del sistema político español*, Madrid, Tecnos, 1999, pp. 255-272.

ROMAN, Manuel, *The limits of economic growth in Spain*, New York, Praeger Publisher, 1971.

- *Hertodox views of finance and cycles in the Spanish economy*, Aldershot, Ashgate, 2002.

ROMANO, Ruggiero, “Historia cuantitativa, historia económica e historia: algunas consideraciones sobre la historiografía francesa de hoy”, *Anales de historia antigua y medieval*, nº 28, (1995), pp. 61-72.

ROMAY LÓPEZ, Rosa y SANTÍN GONZÁLEZ, Daniel, *Nuevas herramientas para gestionar el gasto por incapacidad temporal*, [Madrid], Instituto de Estudios Fiscales, 2003.

ROMERO, M^a Cruz y SAZ, Ismael (eds.), *El siglo XX. Historiografía e historia [5^o, Valencia, 2000]*, Valencia, Universitat de València, 2002.

ROMERO, Luis Alberto, “Los sectores populares urbanos como sujetos históricos”, *Última década*, nº 7, (1997), p. 3.

ROMERO, José J. y RODERO, Adolfo (dirs.), *España en la CEE: del Acta Única al Tratado de Maastricht*, 2^a ed., Córdoba, Etea, 1996.

ROQUERO, Esperanza, *La inserción a la vida activa*, Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1995.

RORTY, Richard, *El giro lingüístico. Dificultades metafísicas de la filosofía lingüística*, Barcelona, Paidós, 1990.

ROS HAMBRAVELLA, Jacinto, *La economía franquista*, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977.

ROSA, Isaac, *La mano invisible*, Barcelona, Seix Barral, 2011.

ROSAT ACED, Carlos (coord.), *Guía práctica de la negociación colectiva*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995.

ROSELL, Francisco, *El bueno de Manolo: biografía no autorizada de Manuel Chaves, el último superviviente del clan de la tortilla*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009.

ROSS, George, HOFFMANN, Stanley y MALZACHER, Sylvia (eds.), *The Mitterrand Experiment. Continuity and Change in Modern France*, Oxford, Blackwell, 1987.

ROSSANDA, Rossana, *La ragazza del secolo scorso*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005.

- *La muchacha del siglo pasado*, Madrid, Foca, 2008.

ROSTOW, Walt W., *Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista*, México / Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1973.

ROUSSEL, Louis, “La solidaridad intergeneracional. Ensayo de perspectivas”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 70, (1995), pp. 11-24.

ROYO, Sebastián, *Social democracy and the collapse of concentration in Spain*, Tesis Doctoral, Boston University, 1998.

- *From social Democracy to Neoliberalism. The consequences of Party Hegemony in Spain, 1982-1996*, London, Palgrave Macmillan, 2000.
- *A new century of corporatism?: Corporatism in Southern Europe. Spain and Portugal in comparative perspective*, Westport, Praeger, 2002.
- “Beyond Confrontation. The resurgence of social bargaining in Spain in the 1990s”, *Comparative Political Studies*, vol. XXXIX, nº 8, (2006), pp. 969-995.

ROZAS VALDÉS, José Andrés y ROMÁN GONZÁLEZ, M^a Victoria, “La tributación de las rentas del capital en los Estados miembros de la Comunidad Europea”, *Hacienda Pública Española*, nº 116, (1991), pp. 175-194.

RUBALCABA BERMEJO, Luis, “Servicios a empresas: marco analítico, magnitud y evolución reciente en Europa” en *Economía Industrial*, nº 313, (1997), pp. 21-43.

RUBIO, M^a Amalia, *Un partido en la oposición: el Partido Socialista Popular*, Granada, Comares, 1996

RUBIO, Mariano, *Mis memorias. Testimonio de una vida truncada por el “Caso Matesa”*, Barcelona, Plaza y Janés, 1991.

RUBIO, Óscar y MONÉS, M^a Antonia, *Curso de macroeconomía*, 2^a ed., Barcelona, Antoni Bosch, 2000.

RUBIO ARRIBAS, Javier, “Aspectos sociológicos del desempleo/paro y de la precariedad laboral”, *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, nº 9, (2004).

RUBIO CASTRO, Ana M^a, “El neocorporativismo español: El Acuerdo Económico y Social (1985-1986)”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 50, (1986), pp. 213-140.

RUBIO de MEDINA, M^a Dolores y CAÑAL RUIZ, José Manuel, *La integración de la mujer en el mercado laboral: normativa protectora*, Barcelona, Bosch, 2004.

RUBIO SANZ, M^a Teresa, “La contabilidad nacional de España en el marco del sistema estadístico europeo”, *Revista de Estudios Europeos*, nº 43, (2006), pp. 99-117.

RUDE, George, *La multitud en la historia: los disturbios populares en Francia e Inglaterra 1730-1848*, Madrid, Siglo XXI, 1979.

RUEDA HERNANZ, Germán (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, Universidad de Cantabria / Asamblea Regional de Cantabria.

RUEDA LÓPEZ, Nuria, BARRUSO CASTILLO, Begoña, CALDERÓN, Carmen y MAR HERRADOR, M^a del, “El grado de cobertura del gasto público en España respecto a la UE-15”, *Documento de Trabajo FUNCAS*, nº 328, (2007).

RUESGA BENITO, Santos M. (comp.), *Economía oculta y mercado de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987.

- *Al otro lado de la economía: cómo funciona la economía sumergida en España*, Madrid, Pirámide, 1988.
- “Empresas y empresarios sumergidos” en *Sistema*, nº 97, (1990), pp.18-23.
- *Los españoles ante la economía sumergida: informe (resultados del estudio 2249)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1997.
- VALDÉS DAL-RÉ, Fernando y ZUFIAUR, José M^a (coords.), *Transformaciones laborales en España: a XXV años de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.
- RESA NESTARES, Carlos (eds.) y FERRER SAIS, Antonio (coord.), *Anuario de relaciones laborales en España*, Madrid, Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 2010, vol. I.

RUIZ, David (dir.), *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*, Madrid, Siglo XXI, 1993.

- RUIZ, David, “Del «obrero consciente» al «currante posmoderno». Las clases trabajadoras en el siglo XX” en MORALES MOYA, Antonio (coord.), *La modernización social*, Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 2001, pp. 407-419.

RUIZ CANTERO, Josefa, *Actitudes y comportamiento de los españoles ante el consumo*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988.

RUIZ-CASTILLO, Javier y SASTRE GARCÍA, Mercedes, “Desigualdad y bienestar en España en términos reales: 1973-74, 1980-81, y 1990-91” en MARAVALL, José M^a (ed.), *Dimensiones de la desigualdad: III simposio sobre igualdad y distribución de la renta y la riqueza*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor, 1999, vol. I, pp. 345-366.

RUIZ GONZÁLEZ, Ricardo José y RENEDO, Alberto, “Deducciones y bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades”, *Partida Doble*, n° 107, (2000), pp. 62-75.

RUIZ-HUERTA, Alejandro, *La memoria incómoda: los abogados de Atocha*, 2ª ed., Burgos, Dossoles, 2002.

RUIZ-MANJÓN, Octavio, “Nuevas orientaciones en Historia Cultural” en MORALES MOYA, Antonio y ESTEBAN, Mariano, (eds.), *La historia contemporánea de España. Primer Congreso de Historia Contemporánea de España [1º, 1992, Salamanca]*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 197-205.

RUIZ MIGUEL, Alfonso (ed.), *Jóvenes y compromiso ciudadano*, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2009.

RUIZ-PASCUAL, Henar Pascual, “Reconversión y reestructuración industrial en Asturias”, *Ería: Revista cuatrimestral de Geografía*, n° 28, (1992), pp. 151-164.

RUIZ RUFINO, Rubén, *La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los Diputados*, Madrid, Fundación Alternativas, 2006.

RUIZ TARRÍAS, Susana, *La posición constitucional del Gobierno en la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos Generales del Estado*, Almería, Universidad de Almería, 2003.

RUIZ TOLEDANO, José Ignacio, “La tributación de la familia en la vigente Ley 18/1991 y en el Proyecto de Ley del IRPF”, *Quincena Fiscal*, n° 16, (1998), pp. 9-24.

RUIZ TORRES, Pedro, “De la síntesis histórica a la historia de *Annales*. La influencia francesa en los inicios de la renovación de la historiografía española” en PELLISTRANDI, Benoît (comp.), *La historiografía francesa del siglo XX y su acogida en España: coloquio internacional (noviembre de 1999)*, Madrid, Casa Velázquez, 2002, pp. 83-107.

- “Political Uses of History in Spain” en REVEL, Jacques y LEVI, Giovanni (coords.), *Political Uses of the Past. The Recent Mediterranean Experience*, London / Portland Or, Frank Cass, 2002, pp. 95-116.
- “El presente y la historia” en RÚJULA LÓPEZ, Pedro Víctor y PEIRÓ MARTÍN, Ignacio (coords.), *La historia en el presente [V Congreso de Historia Local de Aragón, Molinos, 2005]*, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2007, pp. 15-42.
- “De perplejidades y confusiones a propósito de nuestras memorias” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (coord.) *Generaciones y memoria de la represión franquista. Dossier monográfico, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, n° 6/7, (2006/2007).

RÚJULA LÓPEZ, Pedro Víctor y PEIRÓ MARTÍN, Ignacio (coords.), *La historia en el presente [V Congreso de Historia Local de Aragón, Molinos, 2005]*, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2007.

RULL SABATER, Alberto, *Diccionario sucinto de Ministros de Hacienda (siglos XIX y XX)*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991.

RUPÉREZ, Javier, *España en la OTAN: relato parcial*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

- MORO, Carlos (eds.), *El Decenio de González*, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia / Encuentro, 1992.

SAAVEDRA, Antón, *Secuestro del socialismo*, Madrid, Manos Libres, 2004.

- SABEL, Charles, *Trabajo y política. La división del trabajo en la industria*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.
- SABIO, Alberto, *Peligrosos demócratas: antifranquistas vistos por la policía política (1958-1977)*, Madrid, Cátedra, 2011.
- SABORIDO, Jorge y BERENBLUM, Rubén L. (comps.), *Los Pactos de la Moncloa y la Argentina hoy*, Buenos Aires, Macchi, 2002.
- SACRISTÁN, Manuel, "Nota", *Mientras Tanto*, nº 21, (1984), pp. 16-18.
- SADER, Emir y GENTILI, Pablo (comps.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, 2ª ed., Buenos Aires, CLACSO, 2003.
- SÁENZ de COSCULLUELA, Javier, "Las obras públicas. Las infraestructuras" en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del cambio: diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992, pp. 275-295.
- SAÉZ FERNÁNDEZ, Felipe "Mercado de trabajo y rotación laboral" en CARABAÑA MORALES, Julio (coord.) y GARRIDO, Luis Joaquín (ed.), *Reparto de trabajo y crisis social*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 233-252.
- (coord.), *Los servicios en España: situación y tendencias*, Madrid, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, 1993.
- SÁEZ GARCÍA, Miguel Ángel y DÍAZ MORLÁN, Pablo, *El puerto del acero: historia de la siderurgia de Sagunto (1900-1984)*, Madrid, Marcial Pons, 2009.
- SÁEZ LARA, Mª Carmen, *Representación y acción sindical en la empresa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.
- DURÁN LÓPEZ, Francisco (coords.), *Unidad de mercado y relaciones laborales (XXV Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)*, Mairena de Aljarafe, Mergablum, 2007.
 - y id., "Mercado único, libre competencia y Derecho del trabajo" en id. y id. (coords.), *Unidad de mercado y relaciones laborales (XXV Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)*, Mairena de Aljarafe, Mergablum, 2007, pp. 15-56.
- SAEZ MARÍN, Juan, "Los estudios sobre juventud en España: contextos de un proceso de investigación-acción (1960-1990)", *Revista Internacional de Sociología*, nº 10, (1995), pp. 159-197.
- SÁEZ PÉREZ de la TORRES, Federico J., "El funcionamiento del mercado de deuda pública anotada en España", *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 9212, (1992).
- SÁEZ VALCÁRCEL, Ramón, "Los jueces y el aprendizaje de la impunidad, a propósito de los crímenes del franquismo", *Mientras Tanto*, nº 114, (2010), pp. 41-72.
- SAGARDOY, Juan Antonio y LEÓN BLANCO, David, *El poder sindical en España*, Barcelona, Planeta, 1982.
- "Intrahistoria de un Proyecto de Ley. El estatuto de los Trabajadores", *Relaciones Laborales*, nº 1, (1990), pp. 169-181.
 - "Apuntes breves sobre el Acuerdo Económico y Social", *Papeles de Economía Española*, nº 21, (1984), pp. 236-241.
 - [et al.], *La reforma estructural del mercado de trabajo*, Madrid, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 1999.
 - "El porqué del Estatuto de los Trabajadores" en RUESGA, Santos M., VALDÉS DAL-RÉ, Fernando y ZUFIAUR, José Mª (coords.), *Transformaciones laborales en España: a XXV años de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, pp. 221-224.
 - *Los derechos fundamentales y el contrato de trabajo*, Madrid, Thomson Civitas, 2005.
- SALA, Guillem, PLANAS COLL, Jordi y ROMPAEY, Erika van, "¿Trabajan los jóvenes donde «deberían»? Especialidad de formación, especialidad de empleo y resultados de inserción", *Sociología del Trabajo*, nº 70, (2010), pp. 87-106.

SALAS, Rafael, ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago y PRIETO RODRÍGUEZ, Juan, "The evolution of income inequality in the European Union", *Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, nº 2, (2002).

SALAS COLLANTES, Javier, "Permanencia y cambio en el Sector Público Empresarial español: El INI y TENEO", *Presupuesto y Gasto Público*, nº 16, (1995), pp. 33-38.

SALA FRANCO, Tomás y ARNAU NAVARRO, Francisco, *Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996.

- "La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos" en *Panorama actual de la negociación colectiva*. Dossier monográfico, *Revista de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 68, (2007), pp. 171-180.

- BALLESTER PASTOR, M^a Amparo, *Reducción y adaptación de la jornada por conciliación*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009.

SALAS FUMÁS, Vicente y GALVE GÓRRIZ, Carmen, "Propiedad y resultados de la gran empresa española", *Investigaciones Económicas*, vol. XVII, nº 2, (1993), 207-238.

SALINAS MOLINA, Fernando, "Infracciones y sanciones en el orden social: derechos y garantías materiales y procedimentales", *Información laboral. Jurisprudencia*, nº 3, (1999), pp. 4997-5015.

SALINAS RAMOS, Francisco (dir.), *La pobreza en España: extensión y causas*, Madrid, Cáritas Española, 1986.

SALINAS RAMOS y LEÓN PANIAGUA, José, *El derecho a la vivienda como factor de integración social: informe final España 1995*, Madrid, Cáritas Española, 1995.

SALY, Piere, *Méthodes statistiques descriptives pour les historiens*, Paris, A. Colin [1991].

SAMANIEGO, Carlos, "Absentismo, rotación y productividad" en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Andrés (coord.), *Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones*, Madrid, Pirámide, 1998, pp. 247-258.

SAMPEDRO, José Luis, y ALOS MERRY, Fernando, *Ministros de Hacienda y Economía de 1700 a 2005: tres siglos de historia*, Madrid, Ministerio de Hacienda / Centro de Publicaciones, 2003.

SAMPER, Eduardo, "Prensa económica. Los apóstoles de una nueva religión", *Ipmark: Información de publicidad y marketing*, nº 556, (2001), p. 22.

SAMUELSON, Paul A., *Fundamentos del análisis económico*, Buenos Aires, El Ateneo, 1977.

- *Economía con sinceridad*, México, D.F., Lasser Press Mexicana, 1984.

SAN ROMÁN LÓPEZ, Elena, *La industria del automóvil en España: el nacimiento de SEAT*, Madrid, Fundación Empresa Pública, 1995.

SÁNCHEZ, José Antonio y SANTOS, Roberto, *La Conjura del Zar*, Madrid, Temas de Hoy, 1990.

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás (recopilación, análisis y estudio preliminar), *Los precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX*, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1975.

SÁNCHEZ ALONSO, Blanca, "Dr. Frieden y Ms. Kein", *Libro de Economía y Empresa*, nº 2, (2008), pp. 12-13.

SÁNCHEZ BAYLE, Marciano, *Hacia el estado de malestar: neoliberalismo y política sanitaria en España*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1998.

SÁNCHEZ CARO, Eliseo, *Análisis informativo de la huelga general del 14 de diciembre de 1988*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2001.

SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio y BARREIRO, Belén, *Los efectos de la acción de gobierno en el voto durante la etapa socialista (1982-1996)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000.

- "La violencia terrorista en la transición española a la democracia" en AVILÉS, Juan (ed.), *Terrorismo en la España democrática*. Dossier monográfico *Historia del Presente*, nº 14, (2009), pp. 9-24.

- AGUILAR, Paloma, "Terrorist Violence and Popular Mobilization: The Case of the Spanish Transition to Democracy", *Politics & Society*, vol. XXXVII, nº 3, (2009), pp. 428-453.

- PRZEWORSKI, Adam, *Democracia y socialdemocracia. Homenaje a José María Maravall*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012.
- SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep y TABAY, Iván, *Felipe González*, Barcelona, Ediciones B, 2004.
- SÁNCHEZ de DIOS, Manuel, “El «trade-off» eficiencia-equidad y la cohesión social en Alemania, Suecia y el Reino Unido con los Gobiernos social-demócratas”, *Sistema*, nº 211, (2009), pp. 41-72.
- SÁNCHEZ FERRO, Julio, “Consideraciones empresariales sobre el funcionamiento de servicio de empleo a cargo del INEM” en INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM), INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IELSS), DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, *Jornadas Europeas sobre Servicios Públicos de Empleo y Política de Empleo: Madrid, 12-16 de diciembre de 1983*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984, pp. 141-148.
- SÁNCHEZ-JIMÉNEZ, José, *La sociedad postindustrial*, Madrid, Información e Historia, 1995.
- SÁNCHEZ LEÓN, Pablo y IZQUIERDO MARTÍN, Jesús (coords.), *El fin de los historiadores: pensar históricamente en el siglo XXI*, Madrid, Siglo XXI, 2008.
- “Prólogo a la nueva edición. *Historia social/sociología histórica: retorno a un futuro pasado*” en JULIÁ, Santos, *Historia social / sociología histórica*, Madrid, Siglo XXI, 2010.
- SÁNCHEZ LISSEN, Rocío, *Los economistas de la “Escuela de Madrid”*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2007.
- SÁNCHEZ MALDONADO, José y MOLINA MORALES, Agustín, “Efectos de la armonización del IVA en la distribución de la carga fiscal en España”, *Hacienda Pública Española*, nº 116, (1991), pp. 137-144.
- SÁNCHEZ MANGAS, Rocío, *La productividad en la sociedad de la información: impacto de las nuevas formas de organización del trabajo*, Madrid, FEDEA, 2007.
- SÁNCHEZ MONTERO, Simón, *Camino de Libertad. Memorias*, Madrid, Temas de Hoy, 1997.
- SÁNCHEZ MORENO, Esteban, “Jóvenes: la nueva precariedad laboral. La experiencia de la precariedad laboral en los jóvenes españoles”, *Cuadernos de Información Sindical de Comisiones Obreras*, nº 54, (2004).
- DELICADO LOSA, Carmen, *Temporalidad en el empleo y mercado de trabajo para los jóvenes en España*. Dossier monográfico, *OBJOVEM*, nº 2, (2007).
- SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, *Derecho de la Función Pública*, Madrid, Tecnos, 2008.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, Marcial, *Del miedo genético a la protesta: memorias de los disidentes del franquismo*, Sevilla / Barcelona, Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía / Ediciones de Intervención Cultural, 2008.
- SÁNCHEZ MUÑOZ, M^a Paloma, *La demanda de tecnología en España en la década de los 90*, Madrid, Instituto de Estudios y Análisis Económicos, 1992.
- SÁNCHEZ NISTAL, José M^a [et al.], *Problemas actuales de la historia. Terceras Jornadas de Estudios Históricos*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993.
- SÁNCHEZ PADRÓN, Miguel, “El cambio tecnológico” en ETXEZARRETA, Miren (coord.), *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 501-546.
- SÁNCHEZ POZO, José Luis y SÁNCHEZ PÉREZ, José Luis, *Resistencia política y conflictividad social: Getafe 1939/76*, Getafe, Ayuntamiento de Getafe, 2007.
- SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y TASCÓN, Julio (eds.), *Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936-1957*, Barcelona, Crítica, 2003.
- “Los empresarios y la política económica del franquismo en los años sesenta y setenta” en QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael (coord.), *Historia de la Transición en España: los inicios del proceso democratizador*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 157-168.
- *Consenso y enfrentamiento en la Democracia española*. Dossier monográfico, *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea*, nº 9, (2010).

- “Consenso y desacuerdo en la democracia española actual” en id. (ed.), *Consenso y enfrentamiento en la Democracia española*. Dossier monográfico, *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea*, nº 9, (2010), pp. 15-34.
- SÁNCHEZ REVENGA, Jaime, *Presupuestos Generales del Estado y aspectos básicos del presupuesto general de la CEE*, Barcelona, Ariel, 1989.
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Jesús, *Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982)*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004.
- SÁNCHEZ SANDOVAL, Augusto, *Sistemas ideológicos y control social*, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
- SÁNCHEZ SOLER, Mariano, *El libro negro de la corrupción política en España*, Madrid, Tiempo, 1990.
- *Ricos por la patria. Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia*, Barcelona, Plaza & Janés, 2001.
- *Ricos por la guerra de España. El enriquecimiento de la oligarquía franquista desde 1936 hasta la transición*, Madrid, Raíces, 2007.
- *La transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983)*, Barcelona, Península, 2010.
- SÁNCHEZ TABARÉS, Ramón, “Una visión del papel del Estado en la economía: consideraciones sobre el caso español”, *Cuadernos de Economía*, vol. XVIII, nº 51, (1990), pp. 105-155.
- SÁNCHEZ-TERÁN, Salvador, *La Transición: síntesis y claves*, Barcelona, Planeta, 2008.
- SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ, Juan Manuel, *Las horas extraordinarias y su cotización a la Seguridad Social*, Valladolid, Lex Nova, 2004.
- SÁNCHEZ de la YNCERA, Ignacio, “«La sociología ante el problema generacional»: anotaciones al trabajo de Karl Mannheim”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 62, (1993), pp. 147-192.
- SANCHIS, Juan Alberto, “Privatización y eficiencia en el sector público español”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. IV, nº 10, (1996), pp. 65-92.
- SANCHIS, Enric y MIÑANA, José (eds.), *La otra economía: trabajo negro y sector informal*, València, Edicions Alfons el Magnàmin, 1988.
- *De la escuela al paro*, Madrid, Siglo XXI, 1991
- “La banalización del paro contemporáneo”, *Sistema*, nº 170, (2002), pp. 15-44.
- “La experiencia del paro”, *Política y Sociedad*, vol. XL, nº 1, (2003), pp. 161-184.
- *Trabajo y paro en la sociedad posindustrial*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008.
- “Desempleo y conflicto social: del malestar individual al silencio colectivo” en GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.), *Cultura de la precariedad, generaciones y conflicto social*. Dossier monográfico *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, nº 29 (2007), pp. 407-432.
- SANCHÍS SERRA, Arturo Damián, *Condiciones del mercado global de empleo: hacia la precariedad generalizada*, [Albacete], Liber Libro [2009].
- SANCHO, Francisco I. y GARCÍA SOLANES, José, “Movilidad internacional de capitales e integración financiera de la economía española”, *Revista de Economía Aplicada*, vol. VII, nº 21, (1990), pp. 29-60.
- SANGSTER, Joan, *Dreams of equality: women on the Canadian left, 1920-1950*, Toronto, McClelland & Stewart, 1989.
- “Historia Social” en *Encuesta: ¿qué entendemos hoy por Historia Social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp. 213-224.
- SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, *Los empresarios y el conflicto laboral: del cierre a la defensa de la producción*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006.

SANI, Giacomo, “Los desplazamientos del electorado: anatomía del cambio” en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio: Electores y partidos en la España de los años ochenta*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp. 1-26.

SANMARTÍN BURGOS, Israel, “La «New Right» en los años 80 y 90”, *Historia Actual Online*, nº 1, (2003), pp. 39-53.

SANTAMARÍA LÓPEZ, Elsa, *Trayectorias laborales en los márgenes del empleo: Experiencias de precariedad en los procesos de construcción identitaria*, Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco, 2009.

- “«Buscarse la vida»: trayectorias y experiencias de precariedad en el acceso al empleo de las personas jóvenes”. Dossier monográfico, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 89, (2010), pp. 101-123.

SANTAMARÍA OSSORIO, Julián, “Elecciones generales de 1982 y consolidación de la democracia”, , *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 28, (1984), pp. 7-18.

SANTAMARINA, Álvaro, *Enrique Múgica*, Madrid, Cambio 16, 1977.

SANTOS, Félix, ARIJA, José Manuel y CRESPO, Segismundo, *Trabajadores en huelga: Madrid, enero '76*, Madrid, Popular, 1976.

SANTOS, Félix y AROCA MOHEDANO, Manuela (dirs.), *Internacionalismo en la historia reciente de UGT, 1971-1986*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2012.

SANTOS ORTEGA, Antonio, “Identidades formateadas: normalización del empleo inestable y participación juvenil”, *Revista de Estudios de Juventud*, nº 45, (1990), pp. 43-50.

- “La juventud va bien. La cuestión juvenil en la era de la precariedad laboral” CACHÓN, Lorenzo (dir.), *Juventudes, mercados de trabajo y políticas de empleo*, Valencia, 7 i Mig, 1999, pp. 133-151.
- “La invasión de la ideología empresarial en los márgenes del mercado de trabajo: inseguridad laboral, paro e inserción”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, vol. XXI, nº 1, (2003), pp. 107-128.
- *Trayectorias sociales del paro de larga duración*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2004.
- MONTALBÁ OCAÑA, Carmen y MOLDES FARELO, Roció, *Paro, exclusión y políticas de empleo: aspectos sociológicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004.
- SERRANO PASCUAL, Amparo (coords.), *Del desempleo estructural al paro flexible*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XXIV, nº 2, (2006).
- “«Generación flexible»: vivencias de la flexibilidad de los jóvenes parados” en id. SERRANO PASCUAL, Amparo (coords.), *Del desempleo estructural al paro flexible*. Dossier monográfico, *Cuadernos de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XXIV, nº 2, (2006), pp. 63-83.

SANZ, Ana, “Los concursos de televisión: mama (sin tilde), ¡quiero ser famoso!”, *Revistas de Estudios de Juventud*, nº 8, (2007), pp. 193-208.

SANZ SANZ, José Félix y GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel, “La fiscalidad sobre el factor trabajo”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 25-26, (1994), pp. 144-160-

SANZ DÍAS, Begoña, “Las rentas de trabajo: salarios y pensiones. Discrepancias entre los datos tributarios y la Contabilidad Nacional de España”, *Papeles de Trabajo. Instituto de Estudios Fiscales*, nº 21, (1995).

SANZ GADEA, Eduardo, “Comentarios a la Ley 4/1990, de presupuestos generales del Estado para 1990 y Ley 5/1990, de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria”, *Estudios financieros*, nº 89, (1990), pp. 3-18.

SANZ, Vicent y PIQUERAS, José Antonio (eds.), *En el nombre del oficio. El trabajador especializado: corporativismo, adaptación y protesta*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.

- SARACÍBAR, Antón [et al.], *25 años del Estatuto de los Trabajadores (1980-2005)*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2005.
- SARAGOSSÀ i SARAGOSSÀ, Josep Vicente, *Derecho del empleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002.
- SARASQUETA, Antxon, *El abuso del Estado*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.
- SARDA, Jordi y MAULEÓN, Ignacio, “Estimación cuantitativa de la economía sumergida en España”, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 39, (1997), pp. 124-135.
- SARFATI, Hedva y KOBRIN, Catherine *La flexibilidad del mercado de trabajo: antología comparada*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.
- SARO JÁUREGUI, Gabriel, “La política industrial” en CLOSA, Carlos (ed.), *La europeización del sistema político español*, Madrid, Istmo, 2001, pp. 421-440.
- SARTORI, Giovanni, *Parties and party systems: a framework for analysis*, Cambridge, University Press Cambridge, 1976.
- SARTORIUS, Nicolás, *El sindicalismo de nuevo tipo: ensayos sobre Comisiones Obreras*, Barcelona, Laia, 1977.
- “Dos años de gestión del PSOE” en FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (ed.), *La experiencia socialista a debate*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1986, pp. 9-27.
 - y SABIO, Alberto, *El final de la Dictadura. La conquista de la democracia en España (noviembre de 1975-junio de 1977)*, Madrid, Temas de Hoy, 2007.
- SASTRE GARCÍA, Cayo, *Transición y desmovilización política 1975-1978*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997.
- SASTRE IBARRECHE, Rafael, *Derecho sindical y Transición política: un estudio de la jurisprudencia laboral en la etapa democrática, 1975-1978*, Madrid, Tecnos, 1987.
- SATRÚSTEGUI, Miguel, “PSOE: A new catch-all party” en MARAVALL, José Mª [et al.], *Socialist parties in Europe*, II vols., Barcelona, Institut d’Edicions de la Diputació, 1991, vol. II, pp. 33-47.
- SCASE, Richard, *Industrial societies: crisis and division in Western capitalism and state socialism*, London, U. Hymman, 1989.
- SCREPANTI, Ernesto, “Long Cycles in Strike activity: an empirical investigation”, *British Journal of Industrial Relations*, vol. XXV, nº, (1987), pp. 99-124.
- “Los ciclos largos en la actividad huelguística: una investigación empírica”, *Historia Social*, (1989), nº 34-35, (1989) pp. 51-75.
- SAUCA CANO, José Mª y WENCES SIMON, Mª Isabel (eds.), *Lecturas de la sociedad civil: un mapa contemporáneo de sus teorías*, Madrid, Trotta, 2007.
- SAUQUILLO, Francisca, *Mirada de mujer*, Barcelona, RBA, 2002.
- SAWYER, Malcolm, “La economía política de la curva de Philips”, *Hacienda Pública Española*, nº 117, (1991), pp. 215-227.
- SAZ, Ismael, “Introducción” en id. (ed.), *Crisis y descomposición del franquismo*. Dossier monográfico *Ayer*, nº 68, (2007).
- SCASE, Richard (ed.), *The State in Western Europe*, London, Croom Helm, 1980.
- SCASE, Richard, *Industrial societies: crisis and division in Western capitalism and state socialism*, London, U. Hymman, 1989.
- SCHARPF, Fritz W., *Crisis and Choice in European Social Democracy*, Ithaca, Cornell University Press, 1991.
- *Socialdemocracia y crisis económica en Europa*, València, Alfons el Magnànim, 1991.
- SCHNEIDER, Friedrich, “Empirical Results for the Size of the Shadow Economy of Western European Countries over Time”, Discussion Paper. Institut für Volkswirtschaftslehre, Linz University, nº 9710, (1997).

- SCHMID, Günter, *Full Employment in Europe: Managing Labour Market Transitions and Risks*, Cheltenham, Edward Elgar, 2008.
- SCHMIDT-NOWARA, Christopher, “Las plantillas rotas de la historia, ¿qué viene después del giro lingüístico?”, *Historia Social*, nº 63, (2009), pp. 169-174.
- SCHNEIDER, Friedrich, “Empirical Results for the Size of the Shadow Economy of Western European Countries over Time”, Discussion Paper. Institut für Volkswirtschaftslehre, Linz University, nº 9710, (1997).
- SCHWARTZ, Pedro, *Empresa y libertad*, Madrid, Unión Editorial, 1981.
- *Nuevos ensayos liberales*, Madrid, Espasa-Calpe, 1998.
- SCOTT, Joan W., *Gender and the Politics of History*, New York, Columbia University Press, 1988.
- “Sobre el lenguaje, el género y la historia de la clase obrera”, *Historia Social*, nº 4, (1989), pp. 81-98.
 - “Una respuesta a las críticas”, *Historia Social*, nº 4, (1989), 127-135.
 - *Only Paradoxes to Offer. French Feminist and the Rights of Man*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1996.
 - *Parité! Sexual equality and the crisis of French universalism*, Chicago, University of Chicago Press, 2005.
- SEBASTIÁ, Mª Teresa, “El Presupuesto General de las Comunidades Europeas para 1990 y sus efectos en los Presupuestos General del Estado”, *Presupuesto y gasto público*, nº 2, (1990), pp. 211-228.
- SEBASTIÁN, Pablo, “Todos a la OTAN”, *Leviatán*, nº 5, (1981), pp. 83-85.
- SEBASTIÁN GASCÓN, Carlos, “Los presupuestos del Estado para 1984 en el contexto del Programa Económico a medio plazo”, *Hacienda Pública Española*, nº 85, (1983), pp. 61-69.
- “Una nota sobre la generación y utilización del excedente empresarial en la empresa privada española (1981-1984)” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, vol.II, pp. 801-813.
 - “Excedente empresarial, inversión en inmovilizado material y demanda de empleo en la empresa privada”, *Papeles de Economía Española*, nº 26, (1986), pp. 217-229.
- SEGURA, Julio, “La evolución del empleo en la industria española según la Encuesta Industrial (1978-84)” en TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, vol. III, pp. 439-486.
- [et al.], *La industria española en la crisis, 1978-1984*, Madrid, Alianza, 1989.
 - “Del primer gobierno socialista a la integración en la CEE: 1983-1985” en GARCÍA DELGADO, José Luis (dir.), *Economía española de la transición y la democracia, 1977-1986*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1990, pp. 59-77.
 - DURÁN, Federico, TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel, *Análisis de la contratación temporal en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
 - *Teoría de la economía industrial*, Madrid, Civitas, 1993.
 - RODRÍGUEZ BRAÚN, Carlos (eds.), *La economía en sus textos*, Madrid, Taurus, 1998.
 - (coord.), *La productividad en la economía española*, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2006.
- SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *La Unión Europea: breve introducción al Tratado de Maastricht*, Madrid, Secretaria de Estado para las Comunidades Europeas / Comisión de las Comunidades Europeas Oficina en España / Boletín Oficial del Estado, 1992.
- SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, *Plan marco de competitividad del turismo español*, Madrid, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo / Secretaria General de Turismo, [1992].
- SEMPERE, David y SERRANO, Jordi (dirs.), *La juventud y el mercado de trabajo en España*, Barcelona, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, 2000.

SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente, *Nacional sindicalismo y relación de trabajo: la doctrina nacionalsindicalista de la "relación de trabajo" y sus bases ideológicas*, Madrid, Akal, 1982.

- (dir.) y MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Rodrigo (coord.), *El modelo social en la Constitución española de 1978*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003.
- CORDERO SAAVEDRA, Luciano, "Estudio crítico del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo", *Estudios Financieros*, nº 232, (2002), pp. 3-46.
- *Los contratos temporales*, Navarra, Thomson Aranzadi, 2004.
- PÉREZ CAMPOS, Ana Isabel, *SMI e IPREM*, Navarra, Thomson Aranzadi, 2007.
- (dir.) y CARDENAL CARRO, Miguel y ALZAGA RUIZ, Icíar (coords.), *Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales*, Navarra, Aranzadi Thomson Reuters, 2010.

SEMPRÚN, Jorge, *Federico Sánchez se despide de ustedes*, Barcelona, Tusquets, 1993.

SENNETT, Richard, *The Corrosión of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*, New York, W. W. Norton & Company Inc., 1998.

- *La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo*, Barcelona, Anagrama, 2000.
- *The culture of the new capitalism*, New Haven / London, Yale University Press, 2006.
- *La cultura del nuevo capitalismo*, Barcelona, Anagrama, 2006.

SEOANE, M^a Cruz y SUEIRO, Susana, *Una historia de El País y del Grupo Prisa*, Barcelona, Plaza & Janés, 2004.

SERRA i SERRA, Narcís, *España y el Tratado de Maastricht* [Conferencia del Excmo. Sr D. Narcís Serra, Vicepresidente del Gobierno, en la Institución Fernando el Católico], Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1993.

- *La transición militar: reflexiones en torno a la reforma democrática de las fuerzas armadas*, Barcelona, Debate, 2009.

SERRANO PASCUAL, Amparo, *Inserción laboral como transición psicosocial*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1995.

- "Juventud como déficit, juventud como modelo: La construcción de la transición laboral de los jóvenes" en CACHÓN, Lorenzo (dir.), *Juventudes, mercados de trabajo y políticas de empleo*, Valencia, 7 i Mig, 1999, pp. 49-63.

SERRANO SANZ, José María y COSTAS, Antonio, *Ideas y políticas en la economía española de la crisis*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1988.

- "La economía durante la transición y consolidación de la democracia" en RAMOS GASCÓN Antonio (ed.), *España Hoy*, II vols., Madrid, Cátedra, 1991, vol. I, *La sociedad*, p. 109-136.
- COSTAS COMESAÑA, Antón, *Diez ensayos sobre economía española*, Madrid, Eudema, 1993.
- "Crisis económica y transición política" en REDERO SAN ROMÁN, Manuel (ed.), *La transición a la democracia en España*. Dossier monográfico Ayer, nº 15, (1994), pp. 135-164.

SERRANO MARTÍNEZ, Lorenzo, "Convergencia e inflación: un enfoque estructural", *Documento de Trabajo. Centro de Estudios Monetarios y Financieros*, nº 9401, (1994).

SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA, *La política monetaria y la inflación en España*, Madrid, Alianza, 1997.

- *El análisis de la economía española*, Madrid, Alianza, 2005.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, *La calidad de la formación continua a nivel europeo: estándares e indicadores*, [Madrid], Servicio Público de Empleo Estatal [2006].

SERVÉN, Luis, "La empresa pública en un sector estratégico: HUNOSA", *Papeles de Economía Española*, nº 38, (1989), pp. 383-389.

SEVILLA SEGURA, Jorge, “La izquierda y el crecimiento económico”, *Sistema*, nº 97, (1990), pp. 29-40

SEVILLA SEGURA, José V., *Flexibilidad impositiva: un análisis económico del sistema fiscal español*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1976.

- *Economía política de la crisis política*, Barcelona, Crítica, 1985.
- *Política y técnicas tributarias*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales [2004].
- *El declive de la socialdemocracia*, Barcelona, RBA, 2011.

SEVILLA SEGURA, Jordi, *¿Mercado o Estado? Dos visiones sobre la crisis*, Barcelona, Deusto, 2010.

SEWELL, William H., *Work and Revolution in France. The Language of Labor from the Old Regime to 1948*, New York, Cambridge University Press, 1980.

- *Trabajo y revolución en Francia. El lenguaje del movimiento obrero, desde el Antiguo Régimen hasta 1848*, Madrid, Taurus, 1992.
- “Cómo se forman las clases: reflexiones críticas en torno a la teoría de E. P. Thompson sobre la formación de la clase obrera”, *Historia Social*, nº 18, (1994), pp. 77-100.
- *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*, Chicago, University of Chicago Press, 2005.
- “Líneas torcidas” en *De la historia cultural a la historia social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 69, (2011), pp. 93-106.

SHALEV, Michael, “Lies, Damned Lies and Strike Statistics” and “Problems of Strike Measurement” en CROUCH, Colin y PIZZORNO, Alessandro (eds.), *The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968*, II vols., London, Macmillan, 1978, pp. 322-334.

- “Mentiras, mentiras detestables y estadísticas de huelga: medición de las tendencias del conflicto laboral” en CROUCH, Colin y PIZZORNO, Alessandro (comps.), *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa Occidental a partir de 1968*, II vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1968, vol. I, pp. 27-40.

SHARE, Donald, “Two Transitions: Democratization and the Evolution of the Spanish Socialist Left”, *West European Politics*, vol. VIII, nº 1, (1985), pp. 92-103.

- *Dilemmas of Social Democracy: The Spanish Socialist Workers Party in the 1980s*, London, Greenwood Press, 1989.

SIERRA, Fermín de la, *Los directores de las grandes empresas españolas ante el cambio*, Madrid, Centro de Estudios Sociológicos, 1981.

SILVA OCHOA, Juan Carlos da, *El control jurídico de las privatizaciones de empresas*, Madrid, Civitas, 2003.

SILVER, Beverly J., *Forces of Labor. Movements and Globalization since 1870*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

- *Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1970*, Madrid, Akal, 2005.

SILVESTRE CABRERA, M^a, “El grado de postmaterialismo” en ELZO, Javier (coord.), *Los valores en la sociedad vasca: su evolución en los años 1990-1995*, Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996, pp. 255-282.

- *La legitimación socialdemócrata del Estado del Bienestar: PSOE (1979-1990)*, Tesis Doctoral, Universidad de Deusto, 2000

SIMÓN PÉREZ, Hipólito J., “¿Qué determina la afiliación a los sindicatos en España?”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 41, (2003), pp. 68-88.

- FERNÁNDEZ, Melchor y MEIXIDE VECINO, Alberto, “Empleos de bajos salarios y pobreza en España”, *Revista de Economía Laboral*, vol. I, nº 1, (2004), pp. 76-94.

SINGER, Paul, *Economía política del Trabajo: Elemento para un análisis histórico-estructural del empleo y de la fuerza de trabajo en el desarrollo capitalista*, México, Siglo XXI, 1980.

SINOVA, Justino y TUSELL, Javier, *El secuestro de la democracia. Cómo regenerar el sistema político español*, Barcelona, Plaza y Janes, 1990.

- y id., *La crisis de la democracia en España. Ideas para reinventar nuestro sistema político*, Madrid, Espasa, 1997.

SKIDELSKY, Robert, *El regreso de Keynes*, Barcelona, Crítica, 2009.

SMITH, W. Rand, *The left's dirty job: the politics of industrial restructuring in France and Spain*, Toronto, University of Toronto Press, 1998.

SMITHIN, John N., *Macroeconomics after Thatcher and Reagan. The Conservative Policy Revolution in Retrospect*, Aldershot, E. Elgar, 1990.

SOARES, MARIO, *Portugal's struggle for liberty*, London, Allen & Unwin, 1975.

SOBREMONTÉ, José Enrique, *Indultos y amnistía*, Valencia, Universidad de Valencia, 1980.

SOLA ESPINOSA, Jorge, "La desregulación política del mercado de trabajo en España (1984-1997). Un programa de investigación", *Revista de Economía Crítica*, nº 9, (2010), pp. 4-30.

SOLANA, Javier, "La alternativa socialista", *Leviatán*, nº 9, (1982), pp. 7-16.

- *Perspectivas de política cultural: comparecencia del Ministro ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, septiembre de 1986*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1986.

SOLANA VILLAMOR, Francisco, *La armonización de los elementos estructurales de los impuestos especiales: comentarios a la Directiva 12/1992*, Madrid, Información y Documentación Tributaria, 1992.

SOLANS LATRE, Miguel Ángel, *Concertación social y otras formas de neocorporativismo en España y la Comunidad Europea*, Madrid, Tecnos, 1995.

SOLCHAGA, Carlos, "Presentación ante el Pleno del Congreso del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1986", *Hacienda Pública Española*, nº 97, (1985), pp. 21-62.

- "Presentación ante el Pleno del Congreso del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1987", *Hacienda Pública Española*, nº 102-103, (1986), pp. 17-70.
- "Discurso parlamentario sobre la reforma del IRPF", *Hacienda Pública Española*, nº 99, (1986), pp. 205-220.
- "Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988", *Hacienda Pública Española*, nº 105-106, (1987), pp. 23-61.
- "Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989", *Hacienda Pública Española*, nº 112, (1988), pp. 15-44.
- "Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 1990", *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 15-54.
- "Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 1991", *Presupuesto y Gasto Público*, nº 4, (1991), pp. 13-28.
- "1991: las lecciones de la presunta mediocridad", *Economistas*, vol. X, nº 52, (1992), pp. 38-42.
- *El final de la edad dorada*, Madrid, Taurus, 1999.

SOLÉ, Carlota, "El debate corporativismo-neocorporativismo", *Revista de Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 26, (1984), pp. 9-28.

- *Modernidad y modernización*, Barcelona / México D.F., Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana, 1998.

SOLÉ TURA, Jordi, *Una història optimista. Memòries*, Barcelona, Edicions 62, 1999.

SOLOW, Robert, "Insiders and Outsiders in Wage Determination", *Scandinavian Journal of Economics*, vol. LXXXVII, nº 2, (1985), pp. 411-428.

SOMAVIA, Juan, “La centralidad del trabajo en un mundo en crisis” en RUESGA BENITO, Miguel y RESA NESTARES, Carlos (eds.) y FERRER SAIS, Antonio (coord.), *Anuario de relaciones laborales en España*, Madrid, Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 2010, vol. 1, pp. 45-46.

SOPENA GIL, Jordi, “Aspectos fiscales del Real Decreto-Ley 2/1985, sobre Medidas de Política Económica”, *La Ley*, nº 4, (1985), pp. 1056-1062.

SORMAN, Guy, *La revolución neoconservadora americana*, Barcelona, Folio, 1985.

SOSVILLA RIVERO, Simón, “La economía española y la política de cohesión europea” en *Política Económica en España*. Dossier monográfico, *Información Comercial Española*, nº 837, (2007), pp. 211-230.

SOTELO, Adrián, *Crisis capitalista y desmedida del valor, un enfoque desde los Grundrisse*, México, Itaca / Facultad de Ciencias Políticas-UNAM, 2010.

SOTELO, Ignacio, “Paradojas y aporías de los socialistas en el poder”, *Leviatán*, nº 13, (1982), pp. 7-18.

- “Socialismo y marxismo”, *Sistema*, nº 29-30, (1979), pp. 15-26.
- *El socialismo democrático*, Madrid, Taurus, 1980.
- “Paradojas y aporías de los socialistas en el poder”, *Leviatán*, nº 13, (1983), pp. 7-18.
- “Poder institucional y hegemonía social”, *Leviatán*, nº 16, (1984), pp. 47-56.
- *Los socialistas en el poder*, Madrid, El País, 1986
- “Socialismo” en MELLÓN, Joan Antón (ed.), *Ideologías y movimientos políticos contemporáneos*, Madrid, Tecnos, 1988, pp. 273-284.
- *El desplome de la izquierda: modalidades españolas del fin de una época*, Madrid, Akal, 1994.
- *A vueltas con España*, Madrid, Gadir, 2006.
- *El estado social: antecedentes, origen, desarrollo y declive*, Madrid, Trotta / Fundación Alfonso Martín Escudero, 2010.

SOTILLOS, Eduardo, 1982, *el año clave*, Madrid, Aguilar, 2002.

- *Déjame que te cuente*, Madrid, Espejo de Tinta, 2008.

SOTO CARMONA, Álvaro, “El ciclo largo de conflictividad social en España (1968-1986)”, *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, nº 2, (1991), pp. 157-179.

- “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)” en RUIZ, David (dir.), *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 451-523.
- SOTO CARMONA, Álvaro (dir.), *Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical (Evolución Socio-Laboral de Madrid 1939-1991)*, Madrid, GPS, 1994.
- “Auge y caída de la Organización Sindical Vertical Española”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, nº 8, (1995), pp. 247-276.
- “Conflictividad social y transición sindical” en TUSELL, Javier y id. (eds.), *Historia de la transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza, 1996, pp. 363-408.
- “Huelgas laborales en el franquismo: causas laborales-consecuencias económicas”, *Historia Social*, nº 30, (1998), pp. 39-61.
- *El trabajo en España: de la crisis del sistema gremial a la flexibilización*, Madrid, Entrelineas, 2003.
- *Transición y cambio en España, 1975-1996*, Madrid, Alianza Editorial, 2005
- *Atado y bien atado: institucionalización y crisis del franquismo*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.

- (ed.), *La primera legislatura socialista, 1982-1986*. Dossier monográfico *Historia del Presente*, nº 8, (2006).
 - “Introducción” en id. (ed.), *La primera legislatura socialista, 1982-1986*. Dossier monográfico *Historia del Presente*, nº 8, (2006), pp. 9-12.
 - “Una acción más reformista que socialdemócrata” en id. (ed.), *La primera legislatura socialista, 1982-1986*. Dossier monográfico *Historia del Presente*, nº 8, (2006), pp. 13-37.
- SOTO GAMBOA, Ángel, “Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización”, *Historia Actual Online*, nº 3, (2004), pp. 101-116
- SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Juventud, teoría e historia: la formación del sujeto social y de un objeto de análisis”, *Historia Actual Online*, nº 13, (2007), pp. 171-192.
- (coord.), *Ser joven en la Europa de entreguerras: política, cultura y movilización*. Dossier monográfico, *Hispania*, vol. LVII, nº 225, (2007).
- SOUTO PRIETO, Jesús (dir.), *El desempleo: especial consideración de las prestaciones por nivel de asistencia*, Madrid, Consejo del Poder Judicial, 1996.
- SPIEGEL, Gabrielle M., “Comentarios sobre una línea torcida” en *De la historia cultural a la historia social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 69, (2011), pp. 107-118.
- STANSELL, Christine, “Respuesta a Joan Scott” en *Historia Social*, nº 4, (1989), pp. 111-118.
- STIGLITZ, Joseph E., *Caída libre: el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial*, Madrid, Taurus, 2010.
- STONE, Lawrence, “The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History”, *Past and Present*, nº 85, (1979), pp. 3-24.
- STREGA, Enrique, *Sindicatos, empresarios, Gobierno y las reformas laborales. La discusión de la década (1989/1999)*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2000.
- STUCKEY, Mary E., *Playing Game. The rhetoric of Ronald Reagan*, New York, Praeger, 1990.
- SUÁREZ, Mariló, *Los secretos de Almunia*, Barcelona, Alba Editorial, 1998.
- SUÁREZ, Ángel y COLECTIVO 36, *Libro blanco sobre las cárceles franquistas, 1939-1976*, París, Ruedo Ibérico, 1976.
- SUÁREZ PANDIELLO, Javier, SANZO PÉREZ, M^a José y PRIETO RODRÍGUEZ, Juan, “Análisis económico de la actitud hacia el fraude fiscal en España”, *Hacienda Pública Española*, nº 177, (2006), pp. 107-128.
- SUBIRATS, Joan (ed.), *¿Existe sociedad civil en España? Responsabilidades colectivas y valores públicos*, Madrid, Fundación Encuentro, 1999.
- (dir.), GOMÀ CARMONA, Ricard y BRUGUÉ TORRUELLA, Joaquim (coords.), *Análisis de los factores de exclusión social*, Bilbao, Fundación BBVA / Institut d’Estudis Autnòmics, 2005.
- SUMPSI, José M., *Modernización y cambio estructural en la agricultura española*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1994.
- SUQUÍA ARETA, Francisco Javier y VÉLAZQUEZ FERNÁNDEZ, Manuel Pedro y LÓPEZ, Rafael Antonio (coords.), *Cómo es y cómo actúa la Inspección de Trabajo*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1991.
- SURÍS i JORDÀ, Josep M^a, *La empresa industrial española ante la innovación tecnológica*, Madrid, Hispano Europea, 1986.
- SWEEZY, Paul M., *The Theory of Capitalist Development: principles of Marxian political economy*, London, D. Dobson, 1946.
- *Teoría del desarrollo capitalista: principios de la economía política de Marx*, México, Fondo de Cultura Económica, 1970.

SZMOLKA VIDA, Inmaculada, *Veinte años de pertenencia a la Unión Europea: actitudes de los españoles ante el proceso de integración comunitaria*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007.

TAFALLA, Joan, BEL, Josep y VALENZUELA, Pep (coords.), *Miradas sobre la precariedad: debate y propuesta para una 'encuesta sobre el trabajo' y la reconstrucción del sindicalismo de clase*, Barcelona, El Viejo Topo, 2006.

TAFUNELL, Xavier, "Los beneficios empresariales en España (1880-1981): estimación de un índice anual del excedente de la gran empresa", *Revista de Historia Económica*, vol. XI, nº 2, (1998), pp. 367-383.

- "Urbanización y vivienda" en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2ª ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 454-499.
- "Empresa y bolsa" en (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2ª ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 707-834.

TAIBO, Carlos, *España, un gran país. Transición, milagro y quiebra*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2012.

TAJADURA TEJADA, Javier, "La noción de «sociedad democrática avanzada» en la Constitución de 1978", *Sistema*, nº 147, (1998), pp. 27-52.

TAMAMES, Ramón, *La oligarquía financiera en España*, Barcelona, Planeta, 1977.

TAPPI, Andrea, *Un'impresa italiana nella Spagna di Franco: il rapporto Fiat-SEAT dal 1950 al 1980*, Perugia, Crace, 2008.

- *SEAT, modelo para armar: fordismo y franquismo (1950-1980)*, València, Germania, 2010.
- "Fotografía y representación de la fábrica. Imágenes de SEAT durante el franquismo" en CARRERAS, Juan José [Comité Organizador] [et al.], *VI Encuentro de Investigadores del Franquismo: Zaragoza 15, 16 y 17 de noviembre de 2006* [6º, 2009, Zaragoza], Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura, 2009 [CD-ROM].

TATJER, Mª Mercedes y GARCÍA, Emili, "La política de vivienda: el Estado del bienestar vulnerable" en GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coords.), *Políticas públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno*, Barcelona, Ariel, 1998, pp. 223-246.

TASCÓN FERNÁNDEZ, Julio, "La política económica: debates y objetivos" en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (ed.), *Consenso y enfrentamiento en la Democracia española. Dossier monográfico, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea*, nº 9, (2010), pp. 65-100.

TAYLOR, Charles, *Modern Social Imaginaries*, Durham, Durke University Press, 2004.

TAYLOR-GOOBY, Peter, "Privatización y futuro del Estado del Bienestar británico" en RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio (comp.), *Estado, privatización y bienestar: un debate para la Europa actual*, Barcelona, Icaria, 1991, pp. 129-184.

TÉBAR, Javier (ed.), "Contraindicacions de la «política de la victoria». Notes sobre repressió i identitat de la militància obrera dels anys seixanta" en PAGÈS i BLANCH, Pelai (dir.), *Franquisme i repressió: la repressió franquista als països catalans (1939-1975)*, València, Universitat de València, 2004, pp. 273-294.

- (ed.), *El movimiento obrero en la gran ciudad. De la movilización sociopolítica a la crisis económica*, Barcelona, El Viejo Topo, 2011.
- "La clase trabajadora en la «Gran Barcelona»: 1951-1988. Reflexiones para el debate" en id. (ed.), *El movimiento obrero en la gran ciudad. De la movilización sociopolítica a la crisis económica*, Barcelona, El Viejo Topo, 2011, pp. 85-115.

TEJERINA, Benjamín, *La sociedad imaginada: movimientos sociales y cambio cultural en España*, Madrid, Trotta, 2010.

TEMIN, Peter (ed.), *La nueva historia económica. Lecturas seleccionadas*, Madrid, Alianza, 1984.

TEMES MONTES, José Luis, DÍAZ FERNÁNDEZ, José Luis y PARRA VÁZQUEZ, Blanca, *El coste por proceso hospitalario*, Madrid, Interamericana, 1994.

TERMES, Josep, *Anarquismo y sindicalismo en España: La Primera Internacional (1864-1881)*, Barcelona, Ariel, 1972.

- “Prólogo” en BONAMUSA, Francesc, *Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937)*, Barcelona, Anagrama, 1977.

TERMES, Rafael, *Desde la banca. Tres décadas de vida económica española*, II vols., Madrid, Rialp, 1991.

TENA, Antonio, “Sector exterior” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX*, 2ª ed., III vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005 [1989], pp. 573-644.

TERRADILLOS BASOCO, Juan Mª, *La siniestralidad laboral como delito*, Albacete, Bomarzo, 2006.

TERRÉS, Jordi, “La izquierda radical española y los modelos del Este: el referente albanés en la lucha antifranquista. El caso del PCE (m-l)”, *Ayer*, nº 67, (2007), pp. 159-167.

TEZANOS, José Félix, “Ante la necesaria apertura de un proceso constituyente en la España actual”, *Sistema*, nº 17-18, (1977), pp. 3-10.

- *Estructura de clases y conflictos de poder en la España postfranquista*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978.
- “La teoría marxista de las clases, los cambios en la estructura de clases en la España actual y la alternativa socialista”, *Sistema* nº 29-30, (1979), pp. 181-210
- “El espacio político del socialismo español”, *Sistema*, nº 32, (1979), pp. 51-76.
- “Análisis sociológico del voto socialista en las elecciones de 1979”, *Sistema*, nº 31, (1979), pp. 105-122
- “Radiografía de dos Congresos: una aportación al estudio sociológico de los cuadros políticos del socialismo español”, *Sistema*, nº 35, (1980), pp. 79-100
- “Estructura y dinámica de la afiliación socialista en España” en *Partidos políticos y participación política en España*. Dossier monográfico, *Revista de Estudios Políticos*, nº 23, (1981), pp. 117-152.
- GÓMEZ YÁÑEZ, José Antonio, *Los afiliados socialistas. Resultados de una encuesta a los afiliados del PSOE*, Madrid, Grupo Federal de Estudios Sociológicos / Secretaría Federal de Organización, 1981.
- *¿Crisis de la conciencia obrera?* Madrid, Mezquita, 1982.
- *Sociología del socialismo español*, Madrid, Tecnos, 1983.
- “Cambio social y modernización en la España actual”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 28, (1984), pp. 19-62.
- “Continuidad y cambio en el socialismo español: el PSOE durante la transición democrática”, *Sistema*, nº 68-69, (1985), pp. 19-60.
- “Los «encuentros de Játiva» y el futuro del socialismo español”, *Sistema*, nº 75, (1986), pp. 3-16.
- “El sentido político de la concertación social” en *Estado de Bienestar y opciones de política económica*. Dossier monográfico, *Sistema*, nº 80-81, (1987), pp. 157-170.
- *La democratización del trabajo*, Madrid, Sistema, 1987.
- “La democracia industrial como horizonte político”, *Sistema*, nº 94-95, (1990), pp. 3-10.
- (ed.), *La democracia post-liberal*, Madrid, Sistema, 1996.
- “Neoliberalismo, socialismo y democracia”, *Sistema*, nº 145-146, (1998), pp. 17-33.

- “El papel social y político del PSOE en la España de los años ochenta. Una década de progreso y democracia” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del cambio: diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992, pp. 21-56.
 - *Historia ilustrada del socialismo español*, Madrid, Sistema, 1993.
 - (ed.), *Teoría política del socialismo*, Madrid, Fundación Sistema, 1993.
 - “Populismo, corporativismo, neo-bonapartismo”, *Sistema*, nº 129, (1995), pp. 11-24.
 - “Neoliberalismo, socialismo y democracia”, *Sistema*, nº 145-146, (1998), pp. 17-33.
 - *El trabajo perdido: ¿hacia una civilización postlaboral?* Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.
 - *La sociedad dividida: estructura de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.
 - *La democracia incompleta: el futuro de la democracia postliberal*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
 - (ed.), *Juventud y exclusión social. Decimo Foro sobre Tendencias Sociales*, Madrid, Sistema, 2003.
 - (eds.), *Tendencias en desigualdad y exclusión social*, 2ª ed., Madrid, Sistema, 2004.
 - (coord.), *PSOE 125: 125 años del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2004.
 - “El PSOE entra en la democracia” en TEZANOS, José Félix (coord.), *PSOE 125: 125 años del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2004, pp. 126-159.
 - GUERRA, Alfonso (eds.), *La calidad de la democracia, las democracias del siglo XXI (VII Encuentro Salamanca)*, Madrid, Sistema, 2009.
- THATCHER, Margaret, *Los años de Downing Street*, Madrid, El País / Aguilar, 1993.
- *El camino hacia el poder*, Madrid, El País/ Aguilar, 1995.
- THERBORN, Göran, *What does the ruling class do when it rules?: State Apparatuses and State Power under Feudalism, Capitalism and Socialism*, London, New Left Book, 1978.
- *¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estado y poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo*, México, Siglo XXI, 1979.
 - *Por que en algunos países hay más paro que en otros: la extraña paradoja del crecimiento y el desempleo*, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1989.
 - “Global Inequality: The Return of Class”, *Global Dialogue*, vol. II, nº 2, (2011), pp. 3-5 [en castellano, “Desigualdad Global: el retorno de la clase”, *Global Dialogue*, vol. II, nº 2, (2011), pp. 3-5].
- THOMPSON, Edward P., *The Making of the English Working Class*, New York, Vintage Books, 1963.
- *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, II vols., Barcelona, Crítica, 1989, p. XV [1ª ed., en castellano en, Barcelona, Laia, 1977].
 - “Algunas observaciones sobre la clase y la «falsa conciencia»” en *Dos décadas de Historia Social*. Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 10, (1991), pp. 27-32.
 - *Obra esencial Edward Palmer Thompson*, Barcelona, Crítica, 2001 [editado por, Dorothy Thompson].
- THUROW, Lester C., *Corrientes peligrosas: el estado de la ciencia económica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
- THWAITES, Mabel, “La noción gramsciana de hegemonía en el convulsionado fin de siglo. Acerca de las bases materiales del consenso” en FERREYRA, Leandro, LOGIUDICE, Edgardo y id (eds.), *Gramsci mirando al sur. Sobre la hegemonía en los 90*, Buenos Aires, K&ai Editor, 1994.
- TIDDI, Andrea, *Precari. Percorsidi vita tra lavoro e non lavoro*, Roma, Derive Aprrodi, 2002.

TIERNO GALVÁN, Enrique, *Cabos sueltos*, Barcelona, Bruguera, 1982.

TILLY, Charles, TILLY, Louise y TILLY, Richard, *The Rebellious Century, 1830-1930*, Cambridge / Massachusetts, Harvard University Press, 1975.

- *El siglo rebelde, 1830-1930*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997.

TOLOSANA, Carmelo, *Las máscaras de la identidad. Claves antropológicas*, Barcelona, Ariel, 1997.

TOHARIA, José Juan, *Cambios recientes en la sociedad española*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1989.

- (coord.), *Pulso de España 2010: un informe sociológico*, Madrid, Biblioteca Nueva / Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 2011.

TOHARIA, Luis, “La tasa agregada de beneficios y el crecimiento de los salarios en la economía española, 1964-79”, *Revista Española de Economía*, vol. X, nº 3, (1980), pp. 75-88.

- “La evolución de los salarios y los coste laborales en 1984”, *Economistas*, vol. II, nº 11, (1984), pp. 119-121.

- BENTOLILA, Samuel (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, III vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985, vol. I., FINA, Lluís y ESPINA, Álvaro (coords.), *Oferta y demanda de empleo*; vol. II, FINA, Lluís y ESPINA, Álvaro (coords.), *Salarios y políticas de renta*; vol. III, TOHARIA, Luis y BENTOLILA, Samuel (coords.), *El problema del paro*.

- BENTOLILA, Samuel (coords.), *El problema del paro*, vol. III, dentro id. y id. (comps.), *Estudios de economía del Trabajo en España*, III vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.

- “Un fordismo inacabado entre la transición política y la crisis económica: España” en BOYER, Robert (dir.), *La flexibilidad del trabajo en Europa: un estudio comparativo de las transformaciones del trabajo asalariado en siete países, entre 1973 y 1985*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986, pp. 161-184.

- GARRIDO, Luis Joaquín y CEBRIÁN LÓPEZ, Inmaculada, “Los parados de larga duración y la protección social” en MORENO FERNÁNDEZ, Luis y PÉREZ YRUELA, Manuel (coords.), *Política social y estado del bienestar*, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1995, pp. 351-378.

- ROCA JUSMET, Jordi y JUAN ASENJO, Óscar de, *El desempleo en España. Tres ensayos críticos*, Cuenca, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996.

- “Los parados en España: cómo los medimos, cuántos hay y cuántos habrá”, *Debats*, nº 25, (1998), pp. 59-66.

- “Mujer, familia y movilidad en España: un estudio basado en la EPA longitudinal, 1987-1998”, *Papeles de Economía Española*, nº 77, (1998), pp. 133-157.

- DAVIA RODRÍGUEZ, M^a Ángeles y HERNANZ MARTÍN, Virginia, *Flexibilidad, juventud y trayectorias laborales en el mercado de trabajo español. Una explotación del estudio 2321 del Centro de Investigaciones Sociológicas*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001.

- CANTÓ SÁNCHEZ, Olga, “Las prestaciones por desempleo en España: eficiencia y equidad” en *Las nuevas fronteras de la protección social: Eficiencia y equidad en los sistemas de garantía de rentas*. Dossier monográfico, *Hacienda Pública Española*, nº extraordinario (2003), pp. 125-156

- (dir.), *El problema de la temporalidad: un diagnóstico*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.

- PRUDENCIO, Claudio A. y PÉREZ INFANTE, José Ignacio, *La ocupabilidad de los parados registrados*, [Madrid], Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales /INEM-SEPE, 2006

- [et al.], *Empleo e inclusión social*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007.

- CEBRIÁN, Inmaculada, *La temporalidad en el empleo: atrapamiento y trayectorias*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007.
- TOMÁS, Carmen y ALONSO, Ignacio, *El provocador: Carlos Solchaga: de la reconversión industrial a la crisis económica y social*, Madrid, Temas de Hoy, 1992.
- TORCAL, Mariano, “La dimensión materialista/postmaterialista en España: las variables del cambio cultural”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 47, (1989), pp. 227-254.
- CHHIBBER, Pradeep, “Elites, *cleavages* y sistema de partidos en una democracia consolidada: España (1986-1992)”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 69, (1995), pp. 7-38.
- MONTERO, José Ramón, “Party change and cleavage formation: The effects of value on the Spanish Party Socialist System”, *Working Papers Institut de Ciències Polítiques i Socials*, nº 132, (1997).
- MORALES DIEZ de ULZURRUN, Laura y PÉREZ-NIEVAS MONTIEL, Santiago (eds.), *España: sociedad y política en perspectiva comparada: un análisis de la primera ola de la Encuesta Social Europea*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.
- TORNS, Teresa, “Paro y tolerancia social de la exclusión: el caso de España” en MARUANI, Margaret, ROGERAT, Chantal y id. (coords.), *Las nuevas fronteras de la desigualdad: hombres y mujeres en el mercado de trabajo*, Barcelona, Icaria, 2000, pp. 311-326.
- TORRE, Joseba de la y GARCÍA-ZÚÑIGA, Mario (eds.), *Entre el mercado y el estado: los planes de desarrollo durante el franquismo*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2009.
- TORRE CAMPO, Joseba de la y SANZ LAFUENTE, Gloria (eds.), *Migraciones y coyuntura económica del franquismo a la democracia*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008.
- TORRE PRADOS, Isabel de la, “La concertación social en el contexto de una sociedad corporativista: el caso de España”, *Revista de Trabajo*, nº 91, (1988), pp. 117-135.
- TORRES, Lourdes y PINA, Vicente (coords.), *Privatización de empresas y descentralización de servicios públicos*, Madrid, AECA, 1998.
- TORRES, Andrés, *La financiación irregular del PSOE*, Barcelona, Ediciones la Tempestad, 1993.
- TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara de la política económica: España, 1982-1994*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994.
- MONTERO, Alberto y ORTIZ MOLINA, Juan, “La estrategia gubernamental al frente a los problemas económicos” en TORRES LÓPEZ, Juan (coord.), *La otra cara de la política económica: España, 1982-1994*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994, pp. 23-50.
- *Desigualdad y crisis económica. El reparto de la tarta*, Madrid, Sistema, 1995.
- “Sobre las causas del paro y la degeneración del trabajo”, *Sistema*, nº 151, (1999), pp. 37-70.
- *Economía Política*, 3ª ed., Madrid, Pirámide, 2003.
- “La competitividad de la economía española”, *Temas para el debate*, nº 162, (2008), pp. 69-70.
- TORRES SANAHUJA, Santiago de, “La pobreza en España. Análisis y líneas de actuación”, *Documentación Social*, nº 96, (1994), pp. 361-374.
- TORRES VILLANUEVA, Eugenio (dir.), *Los 100 empresarios españoles del siglo XX*, Madrid, LID, 2000.
- TORREGROSA, José Ramón, BERGERE, Joelle y ESTRAMIANA, José Luis A. (eds.), *Juventud, trabajo y desempleo: Un análisis psicológico*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1989.
- TORTELLA, Gabriel, *El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX*, Madrid, Alianza, 1994.
- “La transición bancaria” en JULIÁ, Santos, PRADRERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.), *Memoria de la transición*, Madrid, Taurus, 1996, pp. 569-574.

- “La paranoia económica”, *Revista de Libros*, nº 141, (2008), pp. 9-11.
- TORLOSA, José M^a, *El «cambio» y la Modernización: OTAN, CEE y nuevas tecnologías*, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil Albert, 1985.
- TOSA, Ignacio, “Desde la izquierda por el cambio”, *Leviatán*, nº 10, (1982), pp. 35-48.
- TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel, *El nivel asistencial de protección por desempleo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004.
- TOURAINE, Alain, *La sociedad post-industrial*, 3ª ed., Barcelona, Ariel, 1973
 - *Crítica de la modernidad*, Madrid, Temas de Hoy, 1993.
 - “De la antigua a la nueva sociología del trabajo” en *Antigua y nueva sociología del trabajo*. Dossier monográfico, *Sociología del Trabajo*, nº 35, (1998-1999), pp. 3-24.
 - *Un nouveau paradigme: Pour comprendre le monde d'aujourd'hui*, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2005.
 - *Un nuevo paradigma: para comprender el mundo hoy*, Barcelona, Paidós, 2005.
- TOUSSAINT, Eric, *La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos*, 2ª ed., Buenos Aires, CLACSO, 2004.
 - *La crisis global: perspectivas y alternativas*, Madrid, Popular, 2009.
- TOWSON, Nigel (coord.), *España en cambio: el segundo franquismo, 1959-1975*, Madrid, Siglo XXI, 2009.
- TREGLIA, Emanuele, “El PCE y la huelga general (1958-1967)”, *Espacio, tiempo y forma. Serie V. Historia Contemporánea*, nº 20, (2008), pp. 249-263.
 - *Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero*, Madrid, Eneida, 2012.
- TRIAS VEJARANO, Juan (coord.), *Contribuciones a la historia del PCE*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004 [1980].
- TRILLO PÁRRAGA, Francisco José, *La construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales*, Valladolid, Lex Nova, 2010.
- TRIGO PORTELA, Joaquín, “La reforma del INEM y el mercado de trabajo en España” en *El mercado de trabajo español: reforma y creación de empleo*. Dossier monográfico, *Boletín del Círculo de Empresarios*, nº 57, (1993), pp. 253-272.
 - *Vieja y nueva economía irregular*, Madrid, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 2001.
 - *Veinte años de privatizaciones en España*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2004.
- TRULLÉN i THOMAS, Joan, *Fundamentos económicos de la transición política española. La política económica de los Acuerdos de la Moncloa*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.
- TUDELA CAMBRONERO, Gregorio y VALDEOLIVAS GARCÍA, Yolanda, *Tiempo de trabajo y flexibilidad laboral*, Madrid, Fundación Alternativas, 2005.
- TUÑÓN DE LARA, Manuel, *Historia y realidad del poder: El poder y las élites en el primer tercio de la España del siglo XX*, Madrid, Edicusa, 1967.
 - *El movimiento obrero en la historia de España*, II vols., Barcelona, Laia, 1977 [Madrid, Taurus, 1972].
 - (dir.) y MARTÍN RAMOS, José Luis (coord.), *Historia del socialismo español*, V, vols., Barcelona, Conjunto Editorial, 1989.
 - “El movimiento obrero de 1981 a 1991” en GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix (eds.), *La década del cambio: diez años de gobierno socialista, 1982-1992*, Madrid, Sistema, 1992, pp. 488-520.

- “Última clase magistral de Manuel Tuñón de Lara en la Universidad del País Vasco” en GRANJA, José Luis de la y REIG TAPIA, Alberto (eds.), *Manuel Tuñón de Lara. El compromiso con la historia. Su vida y su obra*, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1993, pp. 447-455.
- TURRIÓN, Jaime y VELÁZQUEZ ANGONA, Francisco J., “El largo camino de la convergencia real de la economía española con la Unión Europea”, *Cuadernos de Información Económica*, nº 183, (2004), pp. 40-47.
- TUSELL, Javier, [et al.] (eds.), *Historia de la Transición y consolidación democrática en España (1975-1986) [Congreso Internacional. Historia de la Transición y Consolidación Democrática en España]*, II vols., Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia / Universidad Autónoma de Madrid, 1996.
- SINOVA, Justino (coords.), *La década socialista: el ocaso de Felipe González*, Madrid, Espasa-Calpe, 1992.
- y id., “Epílogo. El final de una etapa” en id. y id. (coords.), *La década socialista: el ocaso de Felipe González*, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp. 285-295
- SOTO CARMONA, Álvaro (eds.), *Historia de la transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza, 1996.
- LAMO DE ESPINOSA, Emilio y PARDO, Rosa (eds.), *Entre dos siglos: reflexiones sobre la democracia española*, Madrid, Alianza / Fundación José Ortega y Gasset, 1996.
- *La España actual (1982-2000)*, Barcelona, Labor, 2001.
- “Prólogo. La época socialista entra en la Historia” en IGLESIAS, M^a Antonia, *La memoria recuperada: lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes socialistas de sus años de gobierno*, Madrid, Aguilar, 2003, pp. 21-28.
- y QUEIPO DE LLANO, Genoveva G., *Tiempo de incertidumbre: Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición (1971-1976)*, Barcelona, Crítica, 2003.
- UGT, ANE: *Acuerdo Nacional sobre Empleo. Textos, comentarios, desarrollo legal*, Madrid, UGT, 1981.
- “U.G.T. ante el Libro Blanco de la Reindustrialización”, *Economía Industrial*, nº 232, (1983), pp. 99-106.
- UGT, *Qué es la reconversión industrial*, Madrid, UGT, 1984.
- *Homenaje a Rodolfo Llopis Ferrándiz*, Madrid, Comisión Ejecutiva Confederal de FETE-UGT, 2009.
- *Informe de siniestralidad laboral en España (Informe sobre datos a diciembre 2008)*, Madrid, UGT, 2009.
- CEC, *Acuerdos para la reconversión naval de grandes astilleros*, Madrid?, UGT-CEC-Metal, 1984.
- UNIDAD ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, *Informe sobre el fraude en España*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994.
- UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y UNIVERSIDAD DE CIENCIAS SOCIALES DE TOULOUSE, *Transformaciones del derecho del trabajo: nuevas formas de empleo y concertación social. Primeras jornadas interuniversitarias Barcelona-Toulouse. Barcelona, 2 y 3 marzo 1989*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1991.
- URIARTE, Edurne y RUIZ, Cristina, “Mujeres y hombres en las élites políticas españolas: ¿Diferencias o similitudes?”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 88, (1999), pp. 207-232.
- URÍA, Jorge, “Sociología e historia. Una década de historia social en *Sociología del Trabajo*”, *Sociología del Trabajo*, nº 31, (1997), pp. 149-178.
- “La taberna: un espacio multifuncional de sociabilidad popular en la Restauración española”, *Hispania*, vol. LXIII/2, nº 214, (2003), pp. 146-175.

- “La historia social hoy” en *¿Qué entendemos hoy por historia social?* Dossier monográfico, *Historia Social*, nº 60, (2008), pp.233-248.
- URQUIJO, José Ramón de, *Gobiernos y ministros españoles en la Edad Contemporánea*, 2ª ed., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008.
- URQUIZU CAVALLÉ, Ángel, *Las cotizaciones a la Seguridad Social*, Madrid, Marcial Pons, 1997.
- USATEGUI, José Mª, “Subvenciones versus deducciones fiscales en la adopción de innovaciones”, *Hacienda Pública Española*, nº 116, (1991), pp. 195-202.
- USHAKOVA, Tatiana y GIL y GIL, José Luis, “Los convenios del la OIT ratificados por España en el periodo de 1985 a 1999”, *Documentación Laboral*, nº 58, (1999), pp. 73-91.
- VAL, Fernando Ariel de, *Autonomía de clase y crisis del marxismo*, Madrid, Castelltote, 1977.
- VALCÁRCEL, Amelia, “Entrevista con Joaquín Almunia”, *Leviatán*, nº 69, (1997), pp. 5-34.
- VALDÉS, Pedro, *La crisis económica de los ochenta (1980-1990)*, Madrid, Edición del autor, 1989.
- VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Política de empleo y protección del desempleo en España: datos para una evaluación”, *Documentación Laboral*, nº 6, (1982).
- “Flexibilidad en el mercado de trabajo y ordenamiento laboral”, *Papeles de Economía Española*, nº 22, (1985), pp. 302-315.
- “El sistema español de relaciones laborales: una aproximación”, *Relaciones Laborales*, nº 1-2, (1996), pp. 22-59.
- *Relaciones laborales, negociación colectiva y pluralismo social*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996.
- *Las relaciones laborales en la Comunidad de Madrid*, Madrid, Consejo Económico y Social. Comunidad de Madrid, 2000.
- “Salario mínimo interprofesional e igualdad de remuneración por razón de sexo (art. 27 y 28)”, *Civitas*, vol. I, nº 100, (2000), pp. 631-654.
- (coord.), *Sindicalismo y cambios sociales*, Madrid, Consejo Económico y Social, 2004.
- LAHERA FORTEZA, Jesús, *La precariedad laboral en España: por un nuevo marco jurídico de la contratación temporal para la convergencia con el ordenamiento jurídico*, Granada, Comares, 2004.
- (dir.), *30 años de libertad sindical*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007.
- LAHERA FORTEZA, Jesús, *La flexiseguridad laboral en España*, [Madrid], Fundación Alternativas, 2009.
- y id. (coords.), *La transformación del Derecho del Trabajo*. Dossier monográfico, *Cuaderno de Relaciones Laborales de la UCM*, vol. XXV, nº 2, (2007).
- “Treinta años de libertad sindical: en los orígenes del cambio sindical” en id. (dir.), *30 años de libertad sindical*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007, pp. 6-33.
- VALERIO, Julián, “Objetivo: Hacerse oír en Madrid. Los mineros se desplazan a pie hasta la capital para protestar contra la reducción de empleos” en LAVIANA, Juan Carlos (ed.), *El camino de la Libertad (1978-2008). La democracia año a año*, XXX vols., Madrid, Unidad Editorial, 2008, vol. XII, 1992. *España aprovecha para dar el gran salto*, pp. 60-67.
- VALIÑO CASTRO, Aurelia, EDO HERNÁNDEZ, Valentín y PABLOS ESCOBAR, Laura de, “Las desviaciones presupuestarias en el período 1975-1995”, *Papeles de Economía Española*, nº 68, (1996), pp. 36-43.
- VALENZUELA de QUITA, Enrique, “Modelos de organización de la actividad preventiva en Europa”, *La Mutua*, nº 11, (2004), pp. 101-115.
- VALLE SÁNCHEZ, Victorio, “Deuda pública y déficit público”, *Papeles de Economía Española*, nº 33, (1987), pp. 172-184.

- “Ahorro y fiscalidad en la economía española”, *Papeles de Economía Española*, nº 48, (1991), pp. 161-169.
- VALLEJO POUSADA, Rafael, “Economía y Hacienda Pública durante los años del desarrollismo, 1959-1975”, *Hacienda Pública Española*, nº Extra 2002, (2000), pp. 191-228.
- VALLES, Miguel, MONCADA, Alberto y CALLEJO, Manuel, *La juventud ante el trabajo. Nuevas actitudes en los 80. Tres ensayos*, Madrid, Popular, 1987.
- VALLESPÍN, Fernando, “Sociedad civil y «crisis de la política»”, *Isegoría*, nº 13, (1996), pp. 39-58.
- *El futuro de la política*, Madrid, Taurus, 2003.
- VALLS PLA, J., “El precio de compraventa de viviendas en Barcelona (1972-1996)” en VERGÉS, Ricard (ed.), *El precio de la vivienda y la formación del hogar*, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1996, pp. 33-46.
- VAN der VELDEN, Jacobous H. A., VAN der VELDEN, Sjaak, DRIBBUSCH, Heiner y LYDDON, Dave, *Strikes Around the World, 1968-2005: Case-studies of 15 countries*, Amsterdam, Aksant, 2007.
- VARELA, Félix y VARELA, Manuel, “España y los organismos económicos internacionales”, *Información Comercial Española*, nº 826, (2005), pp. 167-177.
- VARELA, José, “Pactos sociales y corporativismo en España” en ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos y patronal en España*, Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 43-73.
- VARELA, Manuel (coord.), *El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la economía española*, Madrid, Pirámide, 1994.
- VARGAS, Bruno, *Rodolfo Llopi (1895-1983): una biografía política*, Barcelona, Planeta, 1999.
- VARGAS-MACHUCA, Ramón, “De la mala conciencia a la conciencia posible: 31º Congreso del PSOE”, *Leviatán*, nº 31, (1988), pp. 5-18.
- OBIOLS, Raimon, DÍAZ, Elías, GARCÍA SANTESMASES, Antonio, “Las señas del socialismo español”, *Leviatán*, nº 37, (1989), pp. 53-93
- VARO MORAL, Nàdia, “Conflicto laboral y militancia antifranquista. Las trabajadoras del área de Barcelona entre los años cuarenta y sesenta” en CARRERAS, Juan José [Comité Organizador] [et al.], *VI Encuentro de Investigadores del Franquismo: Zaragoza 15, 16 y 17 de noviembre de 2006 [6º, 2009, Zaragoza]*, Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura, 2009 [CD-ROM].
- VÁZQUEZ, Norma y MURGUIALDAD, Clara, *Con la sartén sin mango: el trabajo doméstico, base invisible de la economía*, [Palma de Mallorca], Sindicat de Treballadors i Treballadors de l'Ensenyament / Intersindical de les Illes Balears, 2004.
- VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio, “La dinámica económica y reestructuración productiva en España” en MIGUÉLEZ Faustino y PRIETO, Carlos (coords.), *Las relaciones de empleo en España*, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 3-22.
- VÁZQUEZ de PRADA, Valentín, (ed.), *El método histórico: sus posibilidades y límites [Actas de las I Conversaciones Internacionales de Historia, Universidad de Navarra (Pamplona, 1-3 marzo, 1972)]*, 3ª ed., Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1972.
- OLÁBARRI, Ignacio, CASPISTEGUI, Francisco Javier y BURKE, Peter (eds.), *En la encrucijada de la ciencia histórica hoy: el auge de la historia cultural [VI Conversaciones Internacionales de Historia, Universidad de Navarra, Pamplona, 10-12 de abril, 1997]*, Pamplona, EUNSA, 1998.
- VÁZQUEZ GARCÍA, Juan Antonio y ARIAS, Ángel Manuel, “Asturias: crisis y declive industrial”, *Economía Industrial*, nº 263-164, (1988), pp. 35-49.
- VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Ignacio (coord.), *La inspección de trabajo y Seguridad Social*, Pamplona, Aranzadi, 1999.
- VERGE MESTRE, Tània, *Partidos y representación política: las dimensiones del cambio en los partidos políticos españoles, 1976-2006*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007
- VEGA, Rubén, *Crisis industrial y conflicto social: Gijón 1975-1995*, Gijón, Trea, 1998.

- “Los contextos de la acción sindical: franquismo, transición y democracia”, *Sociología del Trabajo*, nº 36, (1999), pp. 133-154.
 - (coord.), *El camino que marcaba Asturias. Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional*, Gijón / Oviedo, Ediciones Trea / Fundación Juan Muñoz Zapico, 2002.
 - “Cortocircuitos de la memoria. Acerca de un proyecto de conmemoración”, *Sociología del Trabajo*, nº 50, (2003/2004), pp. 83-110.
 - “De la dinamita a la huelga del silencio: los mineros asturianos entre la revolución proletaria y la resistencia antifranquista (1934-1962)” en NICOLÁS MARÍN, Encarna y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (eds.), *Ayer en discusión: temas claves de la historia contemporánea hoy [IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Murcia, 17, 18 y 19 de septiembre de 2008]*, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2008 [CD-ROM].
 - “Entre la derrota y la renovación generacional. Continuidad y protesta social” en MATEOS, Abdón (ed.), *La España de los cincuenta*, Madrid, Eneida, 2008, pp. 171-200.
 - *Historia de la UGT. La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1996*, Madrid, Siglo XXI, 2011.
 - (coord.), *Las huelgas de 1962: hay una luz en Asturias*, Oviedo, Ediciones Trea / Fundación Juan Muñoz Zapico, 2012 [1ª ed., 2002].
- VEGA, Pedro y ERROTETA, Peru, *Los herejes del PCE*, Barcelona, Planeta, 1982.
- JÁUREGUI, Fernando, *Crónica del antifranquismo: 1939-1975. Todos los que lucharon por devolver la democracia a España*, Barcelona, Crítica, 2007 [vol. I, 1983; vol. II, 1984].
- VEGA, Santiago, *La política del miedo: el papel de la represión en el franquismo*, Barcelona, Crítica, 2011.
- VEGA MOCOROA, Isabel, *La armonización del IVA y el logro del mercado interior*, Valladolid, Lex Nova, 1991.
- VELARDE FUERTES, Juan, “El final de las utopías”, *Economistas*, vol. II, nº 2, (1984), pp. 18-20
- *Los años en que no se escuchó a Casandra. O el fracaso de la expansión de 1985 a 1992*, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1993.
 - “Orígenes y evolución del actual modelo español de política económica”, *Papeles de Economía Española*, vol. II, nº 100, (2004), pp. 2-9.
 - *Cien años de economía española*, Madrid, Ediciones Encuentro, 2009.
- VELASCO, Luis de, “La insoportable gravedad del déficit exterior”, *Información Comercial Española*, nº 676/677, (1989-1990), pp. 147-150.
- *Políticas del PSOE, 1982-1995: del ‘cambio’ a la decepción*, Barcelona, Icaria, 1996
- VELLAS, François, *Economía y política del turismo internacional*, Madrid, Síntesis, 2004.
- VENTURA GARCÍA, Juan, “La reforma del Servicio Nacional de Salud: el Informe Abril”, *Información Comercial Española*, nº 708-709, (1992), pp. 53-62.
- VERGE, Tània, “Mujeres y partidos políticos en España: las estrategias de los partidos y su impacto institucional, 1978-2004”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº115, (2006), pp. 165-196.
- VERGÉS, Josep C., *Qué quieren los socialistas. La respuesta económica al proyecto socialista*, Barcelona, Sirocco, 1982.
- VERGÉS, Ricard (ed.), *El precio de la vivienda y la formación del hogar*, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1996.
- VERGÉS JAIME, Joaquín, “Efectos de las privatizaciones españolas sobre los Presupuestos Generales del Estado”, *Hacienda Pública Española*, nº 147, (1998), pp. 215-230.
- VERSCHELDEN, Griet, COUSSÉE, Filip, WALLE, Van de y WILLIAMSON, Howard (eds.), *The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy today*, Paris, Council of Europe, 2009.

VICENTE MERINO, Ana M^a, “Los recursos para la financiación de la protección social”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 3, (1989), pp. 119-130.

VICKERS, John y WRIGHT, Vincent (eds.), *The Politics of Privatization in Western Europe*, London, Frank Cass, 1989.

VIDAL-BENEYTO, José, *Del franquismo a una democracia de clase*, Madrid, Akal, 1977.

- (dir.), *Hacia una sociedad civil global: desde la sociedad mundo*, Madrid, Taurus, 2003.

- *Memoria democrática*, Madrid, Foca, 2007.

VIDAL CARUANA, Gonzalo, *Acuerdo Económico y Social: 85-86: análisis*, Bilbao, CISS, 1984.

VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando (dir.) y ORTEGA ALONSO, Elena, *De los recursos a los sujetos: Análisis de las micropolíticas de inserción laboral de jóvenes en España*, Madrid, Instituto de la Juventud, 2003.

VILAGRASA, Joan, “Desarrollo urbano y promotores inmobiliarios en España. Una visión general” en id. (ed.), *Vivienda y promoción inmobiliaria en España*, Lleida, Universitat de Lleida, 1997.

VILAR RODRÍGUEZ, Margarita, *Los salarios del miedo: mercado de trabajo y crecimiento económica en España durante el franquismo*, Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo, 2009.

VILAR, Pierre, *Iniciación al vocabulario del análisis histórico*, Barcelona, Crítica, 1980.

- *Historia marxista, historia en construcción. Ensayo de diálogo con Althusser*, 2^a ed., Barcelona, Anagrama, 1975.

VILARÓS, Teresa M., *El mono del desencanto: una crítica cultural de la transición española (1973-1993)*, Madrid, Siglo XXI, 1998.

VILCHES, M^a Jesús, “Las mujeres ante las nuevas tecnologías” en BAYLOS, Antonio [et al.], *Nuevas tecnologías y clase obrera*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1989, pp. 101-109.

VILLA, Luis Enrique de la y DESDENTADO, Aurelio, *La amnistía laboral: una crítica política y jurídica*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1978.

- GARCÍA BECEDAS, Gabriel, *Leyes sindicales*, Madrid, Akal, 1982.

- *Panorama de las relaciones laborales en España*, Madrid, Tecnos, 1983.

- *Los grandes acuerdos y convenios colectivos a partir de la transición democrática. Antología*, Madrid, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.

- (coord.), *Estudios sobre el salario*, Madrid, ACARL, 1993.

- *La formación histórica del derecho español de trabajo*, Granada, Comares, 2003.

- (dir.), *Ley de procedimiento laboral: comentada y con jurisprudencia*, Madrid, La Ley, 2006.

VILLALÓN OGÁYAR, Juan José, *Identidades sociales y exclusión: ¿qué nos diferencia? ¿qué nos iguala? España, 1985-2004*, Madrid, Fundación FOESSA, 2006.

- “Las identidades sociales de los jóvenes españoles: la edad como elemento clave de división”, *Sistema*, nº 197-198, (2007), pp. 253-282.

VILLAR, Concepción, “Recuperar y repensar la memoria de las mujeres sobre la experiencia sindical”, *Arenal*, vol. VIII, nº 1, (2002), pp. 155-175.

VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo, *Los acuerdos marco sobre la estructura de la negociación colectiva: naturaleza jurídica, eficacia, contenido*, Granada, Comares, 1998.

VILLORIA, Valentín T. y FERNÁNDEZ ALVAREZ, Ana Isabel, “Evolución de los excedentes empresariales”, *Papeles de Economía Española*, nº 52-53, (1991), pp. 315-330;

VIÑALS, José, “¿Es posible la convergencia en España?: En busca del tiempo perdido”, *Documento de Trabajo. Servicio de Estudios del Banco de España*, nº 9430, (1994).

VIÑALS, José, “La economía española ante el cambio de siglo” en TUSELL, Javier, LAMO DE ESPINOSA, Emilio y PARDO, Rosa (eds.), *Entre dos siglos: reflexiones sobre la democracia española*, Madrid, Alianza / Fundación José Ortega y Gasset, 1996.

- JIMENO SERRANO, Juan Francisco, *El mercado de trabajo español y la unión económica y monetaria europea*, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1997.
- “El modelo económico y social europeo: ¿una trinidad inconsistente?”, *Información Comercial Española*, nº 820, (2005), pp. 55-72.

VIÑAS, Ángel, *En las garras del águila: los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe González (1948-1995)*, Barcelona, Crítica, 2003.

VIÑUELA DÍAZ, Julio, “Objetos básicos de la Política Económica del Presupuesto de 1991”, *Presupuesto y Gasto Público*, nº 2, (1990), pp. 43-48.

VIVES, Xavier y GUAL, Jordi (dirs. y coords.), *Concentración empresarial y competitividad: España en la CEE*, Barcelona, Ariel, 1990.

VIVES TORRENTS, Xavier, “La investigación en economía en España en las dos últimas décadas” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.), *Economía y economistas españoles*, IX vol., Barcelona, Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 1999, vol. VIII, *La economía como profesión*, pp. 993-1004.

VOGEL, Laurent, “Derecho del trabajo y precarización de derechos en los Estados de la Unión Europea”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, nº 9, (1996), pp. 243-275.

YABAS, Antonio, *Cambio social y desarrollo económico: de la modernización a la perspectiva del sistema mundial*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1985.

YÁÑEZ, Manuel, *El triunfo de una larga lucha: P.S.O.E.: historia de una transición, el partido más antiguo de Europa, un líder esperado*, Madrid, Gerra, 1982.

YBARRA, Josep-Antoni, *Economía sumergida: el estado de la cuestión en España*, Murcia, Y.A. Ybarra, 1998.

- SAN MIGUEL, Begoña y HURTADO, Jorge, “La economía sumergida en España: un viaje sin retorno”, *Sistema*, nº 168-169, (2002), pp. 247-282.

WAISGRAIS, Sebastián y CALERO, Jorge, “¿Qué determina los procesos de transición al mercado de trabajo?: un análisis aplicado al caso español”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 71, (2008), pp. 35-51.

WAISMAN, Carlos H., *Modernización y legitimación. La incorporación de la clase obrera al sistema político*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1980.

WALLACE, Claire y KOVATCHEVA, Sijka, *Youth in Society. The Construction and Deconstruction of Youth in East and Western Europe*, Basingstoke, MacMillan, 1998.

WALLERSTEIN, Immanuel, “Los ondas largas como proceso capitalista”, *Zona Abierta*, nº 34-35, (1985), pp. 1-18.

- “Response: Declining States, Declining Rights?” *International Labor and Working Class History*, nº 47, (1995), pp. 24-27.
- *Historical capitalism with Capitalist Civilization*, 2ª ed., London, Verso, 2003
- *La crisis estructural del capitalismo*, México DF, Contrahistorias, 2005.

WALTERS, Alan, *Britain's Economic Renaissance: Margaret Thatcher's Reforms, 1979-1984*, Oxford, Oxford University Press, 1986.

- (ed.), *The New Generational contract. Intergenerational relations, old age and welfare*, London, UCL Press Limited, 1996.

WARING, Marilyn, *Si las mujeres contaran: una nueva economía feminista*, Madrid, Vindicación Feminista, 2004.

WAXKOWSKY, Geraldyn, *Felipe González ante el umbral de la era de Acuario: una interpretación psicológica-astrológica de su vida y misión*, Madrid, Altalena, 1983.

WEE, Herman van der, “Métodos y técnicas cuantitativas nuevas en historia económica cuantitativa” en VÁZQUEZ DE PRADA, Valentín (ed.), *El método histórico: sus posibilidades y límites [Actas de las I Conversaciones Internacionales de Historia, Universidad de Navarra (Pamplona, 1-3 marzo, 1972)]*, 3ª ed., Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1972, pp. 135-140.

WERT, José Ignacio, “La campaña electoral de 1982: el camino del cambio”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº28, (1984), pp. 63-84.

WILLIAMS, Allan M., “Socialist economic policies: never off the drawing board?” en GALLAGHER, Tom y WILLIAMS, Alan M. (eds.), *Southern European socialist. Parties, elections and the challenge of government*, Manchester, Manchester University Press, 1989, pp. 188-216.

WILLIAMS, Shirley, “Los grandes problemas económicos y sociales y el paro juvenil” en OCDE, *Jóvenes sin empleo. Tres estrategias. Informe de Shirley Williams y otros expertos*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984, pp. 9-34.

WILLIAMSON, Oliver E., *Las instituciones económicas del capitalismo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.

WILLIAMSON, Jeffrey, *Late nineteenth-century American development. A general equilibrium History*, London, Cambridge University Press, 1974.

- “La cliometría: una visión norteamericana”, *Revista de Historia Económica -Journal of Iberian and Latin American Economic History*, vol. VIII, nº 1, (1990), pp. 39-52.

WILLIS, Paul, *Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajados de clase obrera*, Madrid, Akal, 1988.

WIN, Johanna y WHITE, Robert, *Rethinking Youth*, London, Sage Publications, 1997.

WINDMULLER, John, *Nueva consideración de la negociación colectiva en los países industrializados*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.

WOLPE, Harold (ed.), *The articulation of modes of production: essays from Economy and Society*, London / Boston, Routledge & K. Paul, 1980

WOOD, John C. y WOODS, Ronald N. (eds.), *Sir John R. Hicks*, IV vols., London, Routledge, 1989.

WOZNIAK, Lynne Marie, *Industrial restructuring and political protest in Socialist Spain*, Ann Arbor (Michigan), U.M.I., Dissertation Services, 1994.

YNFANTE, Jesús, *Los muy ricos. Las trescientas grandes fortunas en España*, Barcelona, Grijalbo, 1998.

YSÀS, Pere, “Huelga laboral y huelga política. España 1939-1975” en BONAMUSA, Francesc (ed.), *La Huelga General*. Dossier monográfico, Ayer, nº 4, (1991), pp. 193-212.

- *Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975*, Barcelona, Crítica, 2004.
- “La imposible «paz social»: el movimiento obrero y la dictadura” en *Dictadura y antifranquismo*. Dossier monográfico, *Historia del Presente*, nº 9, (2007), pp. 7-26.
- “La transición española en la democracia: historia y mitos” en ESPUNY TOMÁS, Mª Jesús y PAZ TORRES, Olga (coords.), *30 años de la Ley de Amnistía (1977-2007)*, Barcelona, Dykinson, 2009, pp. 19-40.
- “Movilización y desmovilización obrera. Del franquismo a la democracia” en TÉBAR, Javier (ed.), *El movimiento obrero en la gran ciudad. De la movilización sociopolítica a la crisis económica*, Barcelona, El Viejo Topo, 2011, pp. 273-297.
- “Presentación” en id. (ed.), *La época socialista: Política y Sociedad (1982-1996)*. Dossier monográfico, Ayer, nº 84, (2011), pp. 13-21.
- “Cambios y continuidades: tres lustros de gobiernos socialistas” en id. (ed.), *La época socialista: Política y Sociedad (1982-1996)*. Dossier monográfico, Ayer, nº 84, (2011), pp. 23-49.

ZAGUIRRE, Manuel y HOZ, José Mª de la, *Presente y futuro del sindicalismo*, Barcelona, Nova Terra, 1976.

ZAMORA SANZ, M^a del Mar y ESTAVILLO DORADO, Julio, “Un análisis sectorial-regional de la productividad del trabajo en España”, *Cuadernos de Estudios Empresariales*, n° 12, (2002), pp. 27-48.

ZAPICO GOÑI, Eduardo, *La modernización simbólica del presupuesto público (análisis de la reforma presupuestaria del gobierno socialista)*, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública / Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 1989.

ZAVALA, José M^a, *Las mentiras de González*, Barcelona, Plaza & Janés, 1996.

ZABALZA, Antonio, “El contexto macroeconómico del presupuesto de 1988”, *Hacienda Pública Española*, n° 105-106, (1987), pp. 87-98.

- “El impacto macroeconómico del presupuesto de 1989”, *Hacienda Pública Española*, n° 112, (1988), pp. 45-52.
- “El Presupuesto y su contexto económico”, *Presupuesto y Gasto Público*, n° 2, (1990), pp. 57-62
- “La Política Fiscal y las demandas sociales en el Presupuesto de 1991”, *Presupuesto y Gasto Público*, n° 2, (1990), pp. 31-42.
- “El sector público español ante el mercado único”, *Papeles de Economía Española*, n° 41, (1991), pp. 37-49.
- “La reforma del IRPF y el impuesto de Patrimonio: sus objetos y elementos principales”, *Cuadernos de Actualidad de Hacienda Pública Española*, n° 6, (1991), pp. 149-155.
- “El camino hacia la Unión Económica y Monetaria: una perspectiva española”, *Documento de Trabajo. Dirección General de Planificación. Ministerio de Economía y Hacienda*, n° D-94002, (1994).
- “La recesión de los noventa en la perspectiva de los últimos treinta años de crecimiento económico”, *Moneda y Crédito*, n° 202, (1996), pp. 11-64.

ZALDÍVAR, Carlos Alonso y CASTELLS, Manuel, *España, fin de siglo*, Madrid, Alianza, 1992.

ZAMBRANA, Justo, “¿Es regresiva la política económica del PSOE?”, *Leviatán*, n° 34, (1988), pp. 5-24.

- “El modelo sindical y la democracia industrial en España”, *Sistema*, n° 94-95, (1990), pp. 83-92.

ZAPATERO, Virgilio, “Tres visiones sobre el Estado del Bienestar”, *Sistema*, n° 80-81, (1987), pp. 23-38.

ZARAGOZA, Ángel (comp.), *Pactos sociales, sindicatos y patronal en España*, Madrid, Siglo XXI, 1988.

ZARAGOZA RAMEAU, José Alberto, “El presupuesto en el marco de la planificación económica a medio y largo plazo: El escenario macroeconómico y presupuestario, 1988-1992”, *Hacienda Pública Española*, n° 112, (1988), pp. 53-58.

ZARCO, Juan y ORUETA, Alfonso, “La idea de generación: una revisión crítica”, *Sistema*, n° 144, (1998), pp. 107-115.

ZARRAGA, José Luis (dir.), *Informe Juventud de España 1985. La inserción de los jóvenes en la sociedad*, VII vols., Madrid, Instituto de la Juventud, 1985, vol. I.

- (dir.), *Informe de juventud en España 1989*, Madrid, Instituto de la Juventud, 1988.

ZEMON DAVIES, Natalie, “Las formas de la historia social”, *Historia Social*, n° 10, (1991), pp. 177-182.

ZIMMERMANN VERDEJO, Marta de la ORDEN RIVERO, M^a Victoria y MAQUEDA BLASCO, Jerónimo, *Mortalidad y años potenciales de vida perdidos por accidente de trabajo en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996.

ZUFIAUR, José M^a, *Unión Sindical Obrera*, Barcelona, Avance, 1976.

- “El sindicalismo español en la transición y la crisis”, *Papeles de Economía Española*, n° 22, (1985), pp. 202-234.

- “Luces y sombras de la nueva dimensión comunitaria”, *Economía y Sociología del Trabajo*, nº 17, (1992) ,pp. 61-73.
- “Espacios políticos, autonomía sindical y unidad entre los sindicatos”, *Relaciones Laborales. Revista Crítica de Teoría y Práctica*, nº 1, (1996), pp. 243-253.
- “El *ABI*: la primera manifestación de legislación laboral negociada en España” SARACÍBAR, Antón [et al.], *25 años del Estatuto de los Trabajadores (1980-2005)*, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2005, pp. 90-106.
- “Los contextos del Estatuto de los Trabajadores” en RUESGA, Santos M., VALDÉS DAL-
RÉ, Fernando y ZUFIAUR, José M^a (coords.), *Transformaciones laborales en España: a
XXV años de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores*, Madrid, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, pp. 31-51.
- “¿Quién defiende la Europa social?”, *Temas para el debate*, nº 65-66, (2008), pp. 81-83.

Anexo estadístico

Tabla 2. Evaluación de la economía sumergida en España, 1982/1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
VAB sumergido	16,3	16,5	16,7	17,2	18,7	18,5	18,4	18,9	19,8	19,9	19,4

Fuente: ALANÓN, Ángel y GÓMEZ, Miguel, “Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas”.

Tabla 3. Evolución de las estimaciones de la economía sumergida en España, 1982-1992

	%	E.S. (m.m.)	PIB (m.m.)
1982	17,1	6.490	44.313
1983	17,1	6.622	45.284
1984	16,2	6.372	45.601
1985	15,7	6.338	46.592
1986	15,5	6.460	48.002
1987	15,7	6.892	50.777
1988	15,7	7.247	53.398
1989	15,9	7.700	56.037
1990	16,2	8.131	58.276
1991	16,7	8.606	59.889
1992	18	9.293	60.919

Fuente: SARDA, Jordi y MAULEÓN, Ignacio, “Estimación cuantitativa de la economía sumergida en España”.

Nota: La columna segunda representa el % sobre la economía legal contabilizada.

E.S. Economía sumergida en miles de millones. Pesetas constantes 1990.

Tabla 4. Evolución del PIB a partir de estimaciones alternativas al coste de los factores, 1980-1996 (1995=100)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
CNT95	69,49	69,4	70,26	71,51	72,78	74,47	76,9	81,16	85,3
BBVA	69,6	69,48	70,56	72,13	73,19	75,1	77,5	81,87	86,1
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	
CNT95	89,41	92,8	95,16	96,04	95,05	97,32	100	102,44	
BBVA	90,18	93,55	95,68	96,33	95,21	97,36	100	102,42	

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.4 y elaboración propia.

Tabla 5. Evolución del PIB a precios constantes, 1980-1996 (millones de pesetas de 1995)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
PIB p.m. (1995=100)	65,8	65,41	66,39	67,66	68,4	70,4	72,88	77,7	82,31
PIB p.m. pts. de 1995	47.930.732	47.645.937	48.358.737	49.281.520	49.822.949	51.281.470	53.088.913	56.600.608	59.952.964
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	
PIB p.m. (1995=100)	87,12	90,98	93,73	95,08	94,13	96,71	100	102,44	
PIB p.m. pts. de 1995	63.458.378	66.270.090	68.276.436	69.254.736	68.569.407	70.446.977	72.841.700	74.617.000	

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.6 y elaboración propia.

Tabla 6. Evolución de la demanda interna en España y en la UE, 1982-1992 (en % del PIB)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
España	101,9	100,8	98	98,3	98,2	100,1	101,4	103,4	103,5	103,3	102,9
UE	100,3	99,6	99,3	99	98,3	98,9	99,4	99,8	99,3	100,3	100,1

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 7. Evolución de los diversos componentes de la demanda agregada a precios constantes, 1982-1992 (1995=100)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Consumo privado	72,51	72,72	72,57	75,13	77,62	82,28	86,47
Consumo público	50,15	52,09	53,36	56,29	59,32	65,54	69,18
Formación de capital	56,5	55,78	52,48	53,6	60,05	69,8	81,31
Exportaciones de bienes y servicios	41,29	45,4	50,71	52,05	53,02	56,09	58,62
Importaciones de bienes y servicios	34,99	34,89	34,26	36,96	42,3	50,91	58,25
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Consumo privado	94,82	97,7	100,05	98,12	99,38	100	102,16
Consumo público	82,09	87,89	92,8	96,54	97,82	100	101,27
Formación de capital	100,17	102,54	99,59	87,42	91,81	100	101,79
Exportaciones de bienes y servicios	61,56	66,02	70,54	76,23	88,69	100	110,38
Importaciones de bienes y servicios	73,9	80,66	86,42	82,16	91,83	100	108,02

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.13 y elaboración propia.

Tabla 8. Evolución del consumo privado nacional y el consumo privado nacional per cápita, 1982-1992 (millones de pesetas, 1999)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Consumo privado nacional	34.206.402	34.236.407	34.347.913	35.002.786	36.368.656	38.643.620	40.608.294	42.839.360	44.296.396	45.775.920	47.009.510
Consumo privado nacional per cápita	896.753	898.051	897.304	911.056	943.733	1.000.301	1.048.849	1.104.335	1.140.161	1.176.154	1.205.125

Fuente: MALUQUER, Jordi, “Consumo y precios” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 16.9 y elaboración propia.

Tabla 9. Evolución del gasto anual medio por persona por grupos de gastos (pesetas corrientes) y del IPC (base 1992), 1980, 1985-1992

	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Alimentación, bebidas y tabacos	75.842	119.408	132.602	140.107	142.566	156.832	173.156	180.321	189.985
IPC	38,302	68,295	75,562	79,634	82,3	88,617	94,377	97,675	101,265
Vestido y calzado	20.157	40.526	46.669	51.219	54.002	58.792	64.678	69.649	72.715
IPC	35,465	62,839	62,291	75,707	81,451	85,609	89,914	94,728	99,569
Vivienda, calefacción y alumbrado	44.692	77.366	81.337	88.314	96.977	110.570	128.905	156.021	180.051
IPC	38,488	65,581	69,41	71,748	75,846	81,808	88,151	94,512	100,614
Muebles y enseres	17.778	26.254	27.681	30.377	32.012	38.376	41.547	45.735	50.911
IPC	39,519	68,618	75,374	78,798	81,4747	85,353	89,717	94,286	99,411
Servicios médicos y gastos sanitarios	5.582	8.383	9.187	10.226	12.278	14.174	15.423	17.412	20.276
IPC	33,189	60,448	65,038	68,949	73,318	77,644	82,93	90,934	99,683
Transportes y comunicaciones	32.321	47.196	50.381	60.049	63.457	74.909	84.706	90.660	102.654
IPC	37,196	65,295	68,564	72,211	75,095	79,957	85,701	92,953	100,037
Esparcimiento, enseñanza y cultura	15.981	24.569	25.873	28.378	30.907	35.919	40.735	42.611	49.329
IPC	37,985	66,789	72,316	75,55	79,199	82,506	86,941	92,293	99,295
Otros bienes y servicios	20.013	40.802	43.676	50.752	56.166	67.312	78.697	88.293	96.465
IPC	33,369	56,104	62,984	67,134	71,475	77,038	83,854	91,398	99,956
Gastos no mencionados	5.328	12.456	11.938	13.131	14.361	19.070	17.401	18.870	22.248
Total gasto anual por persona	237.694	396.960	429.344	472.553	502.726	575.954	645.248	709.572	784.634
IPC General	36,748	65,419	71,173	74,908	78,531	83,865	89,502	94,813	100,431

Fuente: MALUQUER, Jordi, “Consumo y precios” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 16.14 y 16.22 y elaboración propia.

Tabla 10. El PIB per cápita, 1980-1996 (miles de pesetas de 1995)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
PIB p.m. per cápita (1995=100)	68,75	67,95	68,6	69,58	70,06	71,85	74,16	78,87
PIB p.m. per cápita pts. de 1995	1.277,20	1.262,40	1.274,50	1.292,70	1.301,60	1.334,80	1.377,60	1.465,10
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
PIB p.m. per cápita (1995=100)	88,06	91,82	94,43	95,57	94,43	96,86	100	102,28
PIB p.m. per cápita pts. de 1995	1.635,80	1.705,70	1.754,30	1.775,40	1.754,30	1.799,40	1.857,70	1.900,10

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.8 y elaboración propia.

Tabla 11. Evolución del PIB p.m. y PIB per cápita en tasas porcentuales de variación interanual, 1980-1996

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
PIB p.m.	5,55	-0,59	1,5	1,91	1,1	2,93	3,52	6,61
PIB p.m. per cápita	4,88	-1,16	0,96	1,43	0,69	2,55	3,21	6,35
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
PIB p.m.	5,85	4,43	3,03	1,43	-0,99	2,74	3,4	2,44
PIB p.m. per cápita	5,64	4,27	2,85	1,2	-1,19	2,57	3,24	2,28

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.9 y elaboración propia.

Tabla 12. Evolución del PIB per cápita España/UE-15, 1982-1992 (UE=100)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Niveles	73,8	73,5	72,9	72,6	72,9	74,8	75,5	76,7	77,6	78,4	78,4
Tasa de variación	0	-0,3	-0,9	-0,3	0,4	2,6	0,9	1,5	1,2	1	0

Fuente: INE, Eurostat, y elaboración propia.

Nota: PIB por habitante en euros en paridad de poder de compra.

Tabla 13. Evolución del grado de apertura de España, 1982-1992 (%)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Grado de apertura (%)	30,6	33,1	35,3	35	29,8	30,8	31,5	32,5	31	30,4	30,4
Grado de apertura comerciable (%)	76	84	92	86	72	75	77	79	77	78	82
Grado de apertura financiera (%)	2,9	1,7	1,4	1,8	1,8	0	1,1	3,3	3,7	3,3	3,3

Fuente: TENA, Antonio, “Sector exterior” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 8.8 y elaboración propia.

Tabla 14. Evolución del comercio exterior de bienes y servicios, 1982-1992 (% PIB)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Importaciones	19,6	20,6	20,1	19,9	17	18,5	19,3	20,6	19,7	19,6	19,7
Exportaciones	17,6	19,8	22,1	21,6	18,8	18,4	17,9	17,2	16,3	16,3	16,8
Déficit comercial de aduanas	-5,9	-5,7	-3,2	-3,3	-3,4	4,9	-5,7	-6,9	-6,3	-6	-5,9

Fuente: INE (SEC-95) y elaboración propia.

Tabla 15. Evolución del grado de apertura de España y la Unión Europea a nivel comunitario, 1982-1992 (Exportaciones de bienes y servicios en % del PIB)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
España	17,6	19,8	22,1	21,6	18,8	18,4	17,9	17,2	16,3	16,3	16,8
UE	28,5	28,6	30,4	30,8	27,7	27	27	28,1	27,9	27,8	25,9

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 16. Evolución del grado de apertura de España y la Unión Europea a nivel extracomunitario, 1982-1992 (exportaciones de bienes y servicios en % del PIB)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
España	5,4	5,9	6,7	6,5	4,3	3,8	3,7	3,5	3,1	2,9	2,8
UE	9,4	9,3	10	10,1	8,2	7,9	7,7	8	7,5	7	6,8

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 17. Distribución geográfica de las exportaciones e importaciones de España, 1982-1992 (%)

	1980-1984	1989	1990-1994			1980-1984	1989	1990-1994
EXPORTACIONES					IMPORTACIONES			
Mercado Común	48,86	60,03	69,46		Mercado Común	31,39	56,93	60,03
Área de Libre Comercio	2,83	5,31	4,04		Área de Libre Comercio	4,17	5,67	5,31
Otros países de Europa Occidental	0,8	0,39	0,61		Otros países de Europa Occidental	0,3	0,38	0,39
Estados Unidos	7,2	7,62	5		Estados Unidos	12,59	9,08	7,62
Canadá	0,82	0,5	0,59		Canadá	0,6	0,49	0,5
Japón	1,49	4,31	1,09		Japón	3,01	4,78	4,31
Australia y Nueva Zelanda		0,34	0,31		Australia y Nueva Zelanda	0,47	0,47	0,34
República de Sudáfrica		0,46	0,21		República de Sudáfrica	0,53	0,67	0,46
Repúblicas iberoamericanas	5,23	4,37	4,93		Repúblicas iberoamericanas	11,24	4,81	4,37
Oriente Medio	8,35	3,89	2,52		Oriente Medio	18,51	4,67	3,89
Otros países asiáticos	0,78	4,14	2,76		Otros países asiáticos	2	3,64	4,14
Europa Oriental y China	1,56	3,14	2,03		Europa Oriental y China	3,17	3,29	3,14
Países africanos	5,03	4,06	3,62		Países africanos	5,27	4,19	4,06
Resto del mundo		0,59	0,84		Resto del mundo	6,75	0,92	1,44
Área de la libra esterlina	10,35	13,07	10,39		Área de la libra esterlina	15,95	12,89	13,07
Área del dólar	8,02	8,65	6,33		Área del dólar	13,9	10,01	8,66

Fuente: TENA, Antonio, “Sector exterior” en ARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 8.7 y elaboración propia.

Tabla 18. Evolución de la estructura por productos y ventaja comparativa revelada (VCR), 1973, 1984, 1989, 1995

1973					VCR	1984					CVR
	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES				IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		
	Productos primarios	46,4	Productos primarios	35,9	-11		Productos primarios	63,7	Productos primarios	31,2	-33
	Semimanufacturas	18,1	Semimanufacturas	18,3	0		Semimanufacturas	13,3	Semimanufacturas	26,7	34
	Manufacturas industriales	35,5	Manufacturas industriales	45,8	12		Manufacturas industriales	23	Manufacturas industriales	42	30
1989					VCR	1995					CVR
	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES				IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		
	Productos primarios	28,7	Productos primarios	28	-1		Productos primarios	29,8	Productos primarios	21,2	-16
	Semimanufacturas	16,7	Semimanufacturas	23,3	16		Semimanufacturas	22,7	Semimanufacturas	21,5	-3
	Manufacturas industriales	54,6	Manufacturas industriales	48,7	-5		Manufacturas industriales	47,5	Manufacturas industriales	57,3	9

Fuente: TENA, Antonio, “Sector exterior” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 8.6 y elaboración propia.

Tabla 19. Evolución del coste de las importaciones españolas de petróleo en % del PIB, 1982-1992

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Coste importaciones españolas de petróleo	1,3	3,5	3,3	3,8	3,5	3,2	3,2	5,1	6,1	5,7	5,6	5,2
	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Coste importaciones españolas de petróleo	4,5	1,9	1,7	1,3	1,4	1,4	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3

Fuente: BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político”, AP2, y elaboración propia.

Tabla 20. Evolución de la participación del petróleo en el consumo de energía primaria en España y en la UE, 1973-1995

%		1973	1980	1988	1995	Variación porcentual		1973-1980	1980-1988	1988-1995	1980-1995
	UE	61	53,3	45,4	42,8		UE	-7,9	-7,9	-0,9	-8,8
	Alemania	55,5	48,3	41,1	40,6		Alemania	-7,2	-5,2	-2,5	-7,7
	Francia	68,7	56,3	43,6	37,8		Francia	-12,3	12,7	-5,8	-18,5
	Italia	73,7	66,1	57,1	58,8		Italia	-7,6	-9	-1,7	-7,3
	Reino Unido	50,4	40,7	38,2	38,2		Reino Unido	-9,7	-2,5	0	-2,5
	España	72,6	72,7	55,9	56		España	0,1	-16,8	0,1	-16,7

Fuente: BOYER, Miguel, “Las etapas de la economía española desde 1975 en su contexto político”, AP9, y elaboración propia.

Tabla 21. Evolución de los principales indicadores de la posición internacional de España en el comercio mundial, 1982-1996

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Precio del petróleo	-7,9	-8,7	3,7	-4,1	-48,2	28,5	-18,9
Precios materias primeras no energéticas	-14,4	18	-8,3	-11,4	3,9	7,3	32,3
Comercio Mundial	-2,8	0,5	8	4,3	6,8	7,6	15,3
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Precio del petróleo	28,4	-15,8	-1,8	-11,9	-4,9	7,8	18,5
Precios materias primeras no energéticas	-9,3	-10,4	-2,8	-0,4	25,9	8,9	-1,3
Comercio Mundial	5	5,1	5,8	4,8	12,1	9,4	6,2

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Tabla 22. Evolución de la inversión directa de España en el Resto del Mundo y la inversión directa del Resto del Mundo en España, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Inversión directa de España en el R.M. (% PIB)	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	0,8	0,4
Inversión directa del R.M. en España (% PIB)	0,9	1	1,1	1,1	1,4	1,5	1,9	2,1	2,7	2,3	2,2
Inversiones españolas en el extranjero (millones de ptas.)	65.525	34.439	49.014	43.810	68.857	100.597	229.707	280.384	454.814	676.904	546.958
Inversiones extranjeras en España (millones de ptas.)	182.842	158.179	267.007	280.085	400.085	727.279	849.500	1.244.998	1.819.851	2.300.996	1.914.494

Fuente: Banco de España, Secretaría de Estado de Comercio y elaboración propia.

Tabla 23. Evolución del saldo de la balanza por cuenta corriente e inversión directa extranjera, 1980-1996 (millones de euros)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Saldo	-678	-527	685	2.058	7.454	4.887	4.123	868	-3.863	-7.977	-9.944	-10.809	-10.729	1.523	-4.729	-139	700
Inversión	926	841	906	612	753	965	2.029	2.604	4.473	5.629	8.479	7.723	8.216	7.320	7.468	4.709	5.193

Fuente: Banco de España, Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 24. Evolución del saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente en España y en la UE, 1982-1992 (en % del PIB)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
España	-2,5	-1,7	1,1	1,2	1,3	-0,2	-1,3	-3,4	-3,8	-3,7	-3,7
UE	-1,1	-0,3	0	0,2	0,9	0,4	-0,1	-0,6	-0,7	-1	-1,2

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 25. Evolución del saldo comercial, 1982-1992 (millones de pesetas corrientes)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Saldo Comercial	-1.240.878,50	-1.330.284,40	-850.919,20	-969.096,00	-1.180.542,00	-1.834.216,00
	1988	1989	1990	1991	1992	
Saldo Comercial	-2.353.142	-3.261.831,10	-3.267.821,00	-3.571.974,60	-3.547.183,10	

Fuente: TENA, Antonio, “Sector exterior” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 8.4 y elaboración propia.

Tabla 26. Evolución de la relación real de intercambio en la economía española, 1978-1992 (1991=100)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Relación real de intercambio	84,1	85,8	73,9	65,9	66,7	63,9	64,2	68	80,8	86,1	90	93,6	97,1	100	101,7

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 27. Evolución de los saldos financieros España-CEE, 1986-1996

	Aportaciones	Recepciones	Millones de €
1986	666,52	616,04	-50,49
1987	825,19	1.043,16	218,17
1988	1.340,26	2.298,27	958,01
1989	1.726,71	2.813,94	1.087,23
1990	2.251,99	2.970,80	718,81
1991	3.280,32	5.618,23	2.337,94
1992	3.893,36	5.861,67	1.968,31
1993	4.451,10	6.787,33	2.336,74
1994	4.828,53	6.913,44	2.084,91
1995	3.702,33	10.535,74	6.833,51
1996	4.441,48	9.928,72	5.487,24

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Nota: €corrientes.

Tabla 28. Balance presupuestario de la UE para España por partidas, 1986-1993

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
FEOGA (garantía)			1.993,19	1.910,78	2.089,58	2.459,81	3.567,70	4.188,20
FEOGA (orientación)			65,6	252,6	188,8	506,9	557,5	400
FEDER			535,4	889,7	1.063,00	1.576,90	1.995,30	1.739
FSE			297,3	494,8	408,3	818,6	814,6	832,2
Devoluciones			115,9	118	122,10	123,00	68,00	
Otros			56,1	57,8	39,4	38,5	542,1	1.097
Total gasto	788,3	1.355,90	3.063,20	3.723,00	3.910,90	5.523,40	7.657,60	8.263
% Gasto UE en España	2,26	3,86	7,25	8,11	8,38	9,62	12,9	12,9
Tasa de cobertura	94,82	128,32	168,58	163,17	132,49	146,17	150,41	159,76

Fuente: CLOSA, Carlos, “La cambiante posición de España en la Unión Europea”, Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 29. Evolución del tipo de cambio de la peseta con respecto a la Libra, el Franco Francés y el Dólar, 1982-1996

	Ptas/£	Ptas/FF	Ptas/\$	Variación anual Ptas/\$
1982	191,68	16,72	109,92	19
1983	217,37	18,82	143,49	30,6
1984	214,37	18,42	160,76	12
1985	219,46	19	170	5,7
1986	205,27	20,22	140,01	-17,6
1987	201,83	20,53	123,54	-11,8
1988	207,1	19,57	116,62	-5,6
1989	194,06	18,57	118,53	1,6
1990	181,36	18,72	102,02	-13,9
1991	183,29	18,42	104,1	2,1
1992	179,9	19,34	102,12	-1,5
1993	191,25	22,46	127,38	24,4
1994	204,92	24,14	133,94	5,2
1995	196,87	24,98	124,73	-6,9
1996	197,64	24,76	126,6	1,6

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Tabla 30. Evolución del tipo de cambio efectivo nominal y con precios de consumo y costes laborales unitarios, 1982-1996. Tasas de variación.

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Tipos de cambio efectivo nominal	-4,4	-15,4	-0,2	-1,7	-3,7	-1	3,4
Con precios de consumo	-0,1	11,7	4,3	1,5	1,5	-0,2	5
Con costes laborales unitarios	-2,2	11,3	1	-1,1	-0,9	-0,2	6,2
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Tipos de cambio efectivo nominal	3,3	2,1	-1,5	24,4	5,2	-6,9	1,6
Con precios de consumo	5	-15,8	-1,8	-11,9	-4,9	7,8	18,5
Con costes laborales unitarios	7,3	-10,4	2,8	-0,4	25,9	8,9	-1,3

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Tabla 31. Evolución del tipo de interés a corto plazo en España y en la UE, 1982-1992 (Interbancario a 3 meses)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
España	16,3	20,1	14,9	12,2	11,7	15,8	11,6	15	15,2	13,2	13,3
UE	13,7	11,9	11,3	10,6	9,1	8,8	8,5	10,9	11,7	11	11,2

Fuente: Banco de España, Eurostat y elaboración propia.

Tabla 32. Evolución del tipo de interés a largo plazo en España y la UE, 1982-1992 (Rentabilidad de los bonos a 10 años)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
España	16	16,9	16,5	13,4	11,4	12,8	11,7	13,7	14,7	12,4	12,2
UE	14,1	12,6	11,8	11	9,2	9,4	9,4	9,8	11,1	10,3	9,8

Fuente: Banco de España, Eurostat y elaboración propia.

Tabla 33. Evolución del tipo de deuda a largo plazo, junto con otras variables, en España, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Tipo de la deuda a L.P (%)	16	16,9	16,5	13,4	11,4	12,8	11,8	13,7	14,7	12,4	11,7
Tipo de intervención (%)	17,4	20,4	14,6	12,3	11,6	15,8	11,3	14	14,6	13,2	12,8
Tipo de interés real ex-post	1,9	7,9	3,6	3,4	2,9	10,6	6,8	8,2	8,4	7,3	7,4

Fuente: Banco de España, Eurostat y elaboración propia.

Tabla 34. Evolución de la inversión pública, la inversión privada, el ahorro privado y el FBCF en % del PIB, 1982-1992 (Tasas de variación)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
FBCFreal	1	-1,2	-4,8	6,7	10,5	12,2	13,6	12	6,4	1,7	-4,1
Inversión pública (% del PIB)	3	2,8	2,9	3,6	3,6	3,4	3,8	4,4	5	4,9	4,1
Inversión privada (% del PIB)	19,5	19,1	17,1	17	17,5	19	20,4	21,2	20,9	20,2	19
Ahorro privado (% del PIB)	20,3	19,6	22,1	23,1	23,1	21,3	22,5	20,7	20,9	21	19,5
Cap. ó nec. de financiación de la nación (% PIB)	-2,5	-1,8	1	1,5	1,5	-0,1	-1	-3	-3,4	-3	-2,9

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Tabla 35. Evolución de las tasas de Ahorro Nacional y la Formación Bruta de Capital, 1982-1992 (en % del PIB)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Ahorro Nacional	19,9	19,9	21,5	21,9	22,9	22,8	23,8	23	22,8	22,1	20,2
Formación Bruta de Capital	22,5	21,9	20,1	20,6	21,2	22,4	24,2	25,6	25,9	25,1	23,1

Fuente: Eurostat, Banco de España y elaboración propia.

Tabla 36. Evolución del stock de capital privado por ocupado, 1982-1992. Tasas de variación

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Stock de capital por ocupado	3,5	2,7	4	3	0,2	-1,5	0,4	1	1	3,3	5,3

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Tabla 37. Evolución de constitución de sociedades anónimas en España, 1982-1992. Numero y capital fundacional (millones de ptas.)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Número	14.672	19.060	21.727	25.619	28.454	28.397	45.778	42.535	11.162	7.025	4.567
Capital	84.696,50	110.945,00	88.368,00	177.807,00	155.008,00	162.928,00	491.000,00	551.752,00	339.122,00	280.834,00	923.167,00

Fuente: TAFUNELL, Xavier, “Empresa y bolsa” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 10.3 y elaboración.

Tabla 38. Evolución del índice de la Bolsa de Madrid, 1982, 1992 (31 diciembre de 1985=100)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Índice Bolsa de Madrid	-9,2	1,2	32,7	26,2	103,7	43,8	10,9	8,6	-14	2,6	-13,2

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Tabla 39. Evolución de los “ALPES”, 1982-1992. Tasas de variación anual

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
ALP	17,9	15,9	15,1	13,8	12,5	15,8	13,9	13,4	12,7	10,9	5,2

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Tabla 40. Construcción de kilómetros de autopistas y autovías en España, 1985-1992 (en miles)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Kilómetros	2.117	2.154	2.276	2.859	3.785	4.693	5.235	6.486

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Tabla 41. Evolución de la tasa de inflación anual en España y en la UE, 1982-1992 (deflactor consumo privado final)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1989	1990	1991	1992
España	19,1	16,5	15,7	14,1	14,4	12,3	10,6	8,1	9,3	5,5	4,8	6,7	6,4	6,6
UE	8,3	9,8	12,4	11,5	10,2	8,2	5,6	3,5	3,4	3,8	5	5,1	5,6	4,5

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 42. Evolución del Índice de Precios de Servicios y de Bienes Elaborados no Energéticos, 1982-1992. Tasas de variación anual

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
IPSEBENE	21,1	17,6	15,8	13,7	14,5	12,5	10,8	8,8	9,9	5,8	5,4	7,1	6,5	6,4	6,8

Fuente: INE, y elaboración propia.

Tabla 43. Evolución de las tasas de cobertura de la negociación colectiva, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Convenios	3.385	3.655	3.794	3.824	3.790	4.112	4.096	4.302	4.595	4.848	4.928
Empresas (miles)	889,3	869,3	836,9	847,1	891,8	996,8	958,3	982,7	1.037,90	1.006,20	1.050,90
Trabajadores afectados (miles)	6.262,90	6.226,30	6.181,90	6.131,10	6.275,10	6.867,70	6.864,70	6.993,70	7.623,90	7.821,80	7.640,20
Tasa de cobertura (%)	82,2	81,5	84,5	83,9	80,4	82,2	82,2	78,8	82,2	83,5	84,2

Fuente: ROCA, Jordi *Pactos sociales y políticas de renta*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia.

Nota: Los años están indicados según el inicio de los efectos económicos.

Para 1982 los datos no cubren los datos de convenios provincial e inferior de Cataluña.

Tabla 44. Evolución de las tasas de cobertura por negociación colectiva en el ámbito de la empresa y ámbito superior, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Convenios de empresa	2.186	2.376	2.539	2.590	2.588	2.817	2.826	3.016	3.137	3.474	3.627
Trabajadores afectados (miles)	986	1.074,60	1.060,50	1.062,50	1.092,80	1.106,50	1.070,40	1.061,90	1.084,50	1.151,00	1.190,70
Convenios ámbito superior	1.199	1.279	1.257	1.244	1.202	1.295	1.270	1.286	1.297	1.374	1.383
Trabajadores afectados (miles)	5.277,20	5.277,20	5.121,40	5.068,70	5.182,30	5.761,20	5.794,30	5.931,80	5.967,50	6.670,80	6.731,20
Tasa de cobertura (%)	15,7	17,2	17,1	17,3	17,4	16,1	15,6	15,2	15,3	14,7	15,1

Fuente: ROCA, Jordi *Pactos sociales y políticas de renta*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia.

Nota: Los años están indicados según el inicio de los efectos económicos.

Tabla 45. Cuadro comparativo de la norma salarial, variación del IPC e incremento salarial pacto en convenios, 1982-1989

		Norma salarial (%)	Variación IPC (%)	Incremento pactado en convenios (%)	Aumento previsto IPC (%)
1982	ANE	9%	14,4	12,02	12,5
1983	AI	9,5-12,5%	12,2	11,44	12
1984	Recomendación gubernamental	6,50%	11,3	7,81	8
1985	AES	5,5-7,5%	8,8	7,9	7
1986	AES	7,2-8,5%	8,8	8,23	8
1987	Recomendación gubernamental	5%	5,3	6,51	3
1988	Recomendación gubernamental	3%	4,8	6,38	5
1989			6,6	7,7	3

Fuente: ROCA, Jordi *Pactos sociales y políticas de renta*, tabla 6, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y elaboración propia.

Tabla 46. Evolución de los salarios pactados en la negociación colectiva, la inflación anual y el poder adquisitivo, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Salarios pactados	12,02%	11,44%	7,81%	7,90%	8,23%	6,51%	6,38%	7,77%	8,33%	7,96%	7,27%
Inflación anual	14,50%	12,20%	11,30%	8,80%	8,80%	5,26%	4,81%	6,80%	6,70%	5,90%	5,90%
Poder adquisitivo	-2,48	-0,76%	-3,49	-0,9	-0,57	1,25	1,57	0,97	1,63	2,06	1,37

Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y elaboración propia.

Tabla 47. Evoluciones de los salarios pactados, nominales y reales, 1982-1992 (tasas de variación, %)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Salarios nominales											
Pactados	12	11,4	7,8	7,9	8,2	6,5	6,1	7,8	8,3	8	7,3
Brutos	14,5	13,5	9,3	8,6	11,4	7,1	6	5,8	8,6	7,6	7,5
Salarios reales											
Pactados	-1,8	-0,6	-1,1	-0,3	0,1	1,8	0,6	0,8	1,7	2,4	1,9
Brutos	0,4	1,3	0,3	0,4	2,9	2,4	0,2	-1	2	2	2,1

Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y elaboración propia.

Nota: Deflactados los salarios nominales por el IPC.

Tabla 48. Evolución de la tasa anual de los salarios pactados en convenios, a nivel total, por empresa y en otros ámbitos, 1982-1992

	Total	De empresa	Otro ámbito
1981	-1,30%	-2,30%	-1,00%
1982	-2,10%	-2,80%	-1,90%
1983	-0,70%	0,50%	0,70%
1984	-3,10%	-3,80%	-3%
1985	-0,80%	-1,00%	-0,80%
1986	-0,50%	-0,50%	-0,50%
1987	1,20%	1%	1,20%
1988	1,50%	0,80%	1,60%
1989	0,90%	0,50%	1,00%
1990	1,50%	1,30%	1,60%
1991	1,90%	1,80%	2,00%
1992	1,30%	1,10%	1,30%

Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y elaboración propia.

Tabla 49. Evolución de la tasa acumulada desde 1981 en relación a los salarios pactados en convenios, a nivel total, por empresa y otros ámbitos, 1982-1992

	Total	De empresa	Otro ámbito
1981	-1,30%	-2,30%	-1,00%
1982	-3,30%	5,10%	-2,90%
1983	-4,00%	5,60%	-3,60%
1984	-7,00%	-9,20%	-6,50%
1985	-7,70%	-10,10%	-7,20%
1986	-8,20%	-10,60%	-7,70%
1987	-7,10%	-9,60%	-6,60%
1988	-5,80%	-8,90%	-5,10%
1989	-4,90%	-8,40%	-4,10%
1990	-3,40%	-7,30%	-2,60%
1991	-1,60%	-5,60%	-0,70%
1992	-0,30%	-4,60%	0,60%

Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y elaboración propia.

Tabla 50. Ganancia media por trabajador y mes en jornada normal y extraordinaria, 1980-1996 (ptas. corrientes)

	1980-IV	1981-IV	1982-IV	1983-IV	1984-IV	1985-IV	1986-IV	1987-IV
Ptas.	51.031	65.431	74.915	74.915	81.395	88.972	97.969	105.929
	1989-IV	1990-IV	1991-IV	1992-IV	1993-III	1994-IV	1995-IV	1996-IV
Ptas.	121.232	131.756	142.927	154.060	162.963	209.634	219.078	228.913

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.25 y elaboración propia.

Nota: Todos los años están computados durante el IV Trimestre, a excepción de 1993 durante el III Trimestre.

Tabla 51. Coste laboral medio por trabajador y mes en ptas. Coste salarial, 1982-2000 (100=2000)

	1982-IV	1983-IV	1984-IV	1985-IV	1986-IV	1987-IV	1988-IV	1989-IV	1990-IV
Ptas.	79.570,78	91.292,67	99.803, 31	107.926,28	117.849,54	127.055,68	133.874,18	144.269,97	155.337,97
Índice	36,1	41,4	45,2	48,9	53,4	57,68	60,7	65,5	70,4
	1992-IV	1993-IV	1994-IV	1995-IV	1996-IV	1997-IV	1998-IV	1999-IV	2000-IV
Ptas.	179.660,28	198.658,23	1.980.658,23	207.608,13	216.717,77	223.351,57	227.897,24	233.679,15	238.956,92
Índice	81,4	86,6	90,1	94,1	98,2	101,3	101,3	105,9	108,3

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.26 y elaboración propia.

Tabla 52. Evolución del salario real por persona empleada en España y en la UE, 1982-1992. Tasas de variación anual

	España	UE
1982	-0,5	-0,1
1983	1,4	0,4
1984	-0,2	0
1985	1	0,9
1986	0,2	2,3
1987	1,5	1,4
1988	2,5	1,5
1989	0,6	0,9
1990	3,3	2,1
1991	3,4	1,4
1992	4,5	2,5

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 53. Evolución del salario real y el salario real neto a partir de la base de datos del Modelo Hermin-España, 1982-1992. Tasas de variación anual (%)

	Salario real	Salario real neto
1982	3,9	4,19
1983	2,85	-3,25
1984	-1,29	-7,22
1985	1,77	-1,07
1986	0,27	3,18
1987	0,43	0,2
1988	0,78	5,11
1989	-0,29	4,07
1990	1,52	7,92
1991	1,65	3,42
1992	3,59	-3,35

Fuente: BAJO, Óscar y MONÉS, M^a Antonia, *Curso de macroeconomía*, cuadro 4, y elaboración propia.

Tabla 54. Evolución Salario Mínimo Interprofesional, 1982-1992 (mayores de edad)

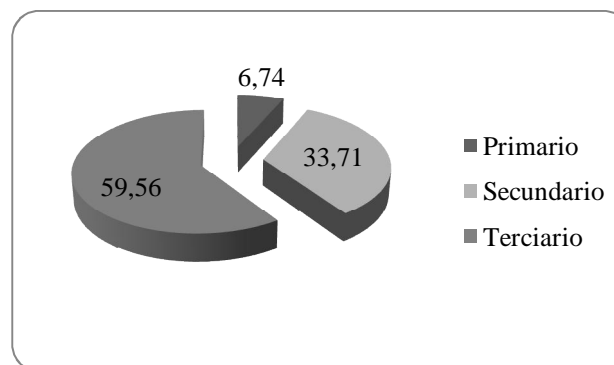
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Ptas. por día	948	1.072	1.158	1.239	1.338	1.405	1.468	1.556	1.667	1.775	1.876
Ptas. por mes	28.440	32.160	34.740	37.140	40.140	42.150	44.040	46.680	50.010	53.250	56.280
Aumento %	11	13,1	8	7	8	5	4,5	6	7,1	6,5	5,7

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, "Trabajo y relaciones laborales" CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.28 y elaboración propia.

Tabla 55. Participación en porcentaje del PIB de los distintos sectores económicos, 1977-1996

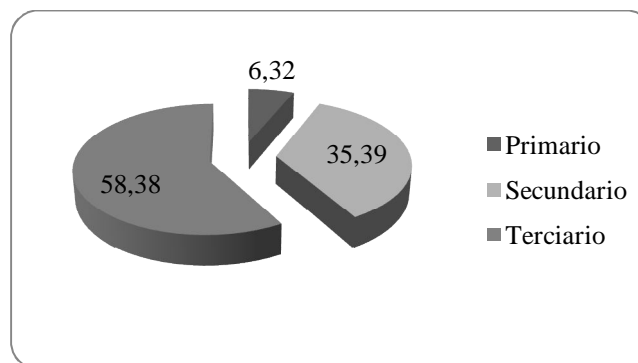
	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Primario	9,24	8,98	7,93	7,32	6,55	6,74	6,45	6,84	6,39	6,32
Secundario	37,08	36,43	36,12	36,72	34,7	33,71	33,18	31,61	34,18	35,39
Terciario	53,67	54,58	55,95	55,96	58,75	59,56	60,37	61,56	59,43	58,38
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Primario	6,15	6,05	5,48	5,48	4,98	4,42	4,76	4,87	4,62	5,05
Secundario	35,02	34,7	34,66	34,66	34,23	32,56	30,92	30,57	30,98	30,46
Terciario	58,83	59,29	59,86	59,86	60,78	63,02	64,32	64,56	64,4	64,49

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.10 y elaboración propia.

Gráfico 12. Participación en porcentaje del PIB de los distintos sectores económicos, 1982

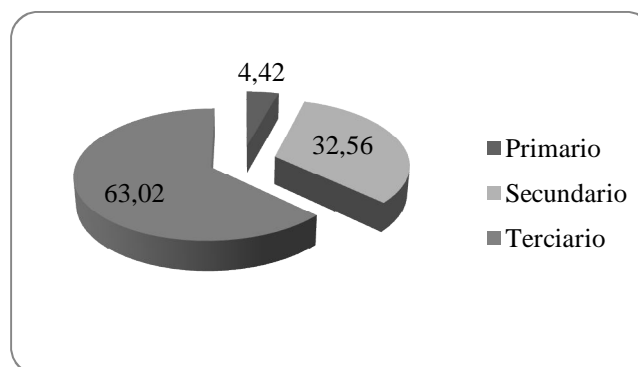
Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.10 y elaboración propia.

Gráfico 13. Participación en porcentaje del PIB de los distintos sectores económicos, 1986



Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.10 y elaboración propia.

Gráfico 14. Participación en porcentaje del PIB de los distintos sectores económicos, 1992



Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.10 y elaboración propia.

Tabla 56. Evolución de los diversos sectores económicos que componen el PIB, 1982-1992 (a precios constantes, 1995=100)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Agricultura	72,79	77,34	84	86,61	78,73	89,79	94,8
Industria	71,74	72,9	73,69	75,23	78,84	83,16	87,57
Construcción y obras públicas	65,11	65,18	61,16	62,53	66,24	71,83	79,21
Servicios	64,76	66,63	67,91	69,19	71,64	75,09	78,81
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Agricultura	95,41	97,28	100,32	108,34	106,8	100	117,55
Industria	94,04	96,12	95,67	93,1	95,85	100	102,01
Construcción y obras públicas	99,41	102,57	96,89	91,86	93,65	100	98,61
Servicios	86,59	89,21	92,98	94,3	96,94	100	101,83

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.11 y elaboración propia.

Tabla 57. Población y demanda de trabajo, 1970-2000. Serie quinquenal

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000
Población total	33.877.725	35.519.084	37.426.715	38.578.841	39.160.900	39.613.260	40.425.439
Total de empleos	13.014.422	13.288.654	12.828.038	12.528.745	13.301.210	14.297.084	16.595.579
Agricultura y pesca	3.740.543	3.083.041	2.471.815	1.970.811	1.544.872	1.218.748	1.213.358
Industria	3.051.997	3.237.641	3.145.059	2.935.963	2.960.957	2.731.015	3.186.802
Construcción	1.163.616	1.302.442	1.072.435	936.814	1.223.957	1.364.755	1.777.634
Servicios	5.508.266	5.665.530	6.138.729	6.685.157	7.571.424	8.982.566	10.417.785
Empleo asalariado	8.691.021	9.313.144	9.167.096	9.066.804	9.973.597	11.187.156	13.289.477
Agricultura y pesca	1.271.792	1.056.464	881.495	716.297	589.306	521.676	557.574
Industria	2.680.899	2.884.325	2.801.465	2.605.279	2.626.655	2.407.492	2.842.674
Construcción	1.044.747	1.154.455	898.997	726.131	958.552	1.069.400	1.453.447
Servicios	3.693.583	4.217.900	4.485.139	5.019.097	5.799.084	7.188.588	8.435.782

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.13 y elaboración propia.

Tabla 58. Ocupados por sectores, 1982-1992 (%) sobre el total

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Agricultura	17,3	17,3	17	16,4	14,6	13,6	13	11,8	11	9,9	9,3
Industria	23,5	23,1	23	23,5	23,5	23,2	22,8	22,7	22,6	22,1	21,7
Construcción	7,9	7,6	7,7	6,9	7,4	7,9	8,4	9	9,4	9,7	9,3
Servicios	51,3	51,9	52,3	53,2	54,6	55,3	55,8	56,5	57	58,3	59,7

Fuente: INE, y elaboración propia.

Tabla 59. Evolución de la destrucción de empleo industria, 1974-1984

	Tasa de paro industrial	Destrucción de empleo industrial, 1974-1984
País Vasco	16,1	119.150
Cataluña	18,3	287.505
Asturias	9,4	26.100
Galicia	13,3	19.504
Andalucía	18	58.125
Madrid	15,4	71.800
Cantabria	9,1	13.106
Baleares	8,8	25.350
Navarra	10,4	19.245
Murcia	14,1	13.524
Extremadura	18,5	15.163
Canarias	20,7	12.101
La Rioja	9,5	9.433
Aragón	14,3	36.314
Castilla-La Mancha	11,4	17.524
Castilla-León	12,5	10.800
C. Valencia	19,1	43.121
Total	16	798.495

Fuente: INE, y elaboración propia.

Tabla 60. Estructura Grupo INI. Balance de situación. Principales rúbricas del activo y pasivo, 1982-1992 (millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Activo											
Inmovilizado neto	1.654.918	1.862.785	2.154.937	2.285.376	2.252.653	2.346.740	2.263.059	2.266.923	2.351.471	2.703.612	3.229.663
Inmovilizado material e inmaterial	1.195.777	1.501.163	1.704.220	1.901.549	1.933.641	2.020.244	1.998.424	2.026.723	2.130.720	2.302.426	2.653.900
Inmovilizado financiero	79.496	201.586	219.252	240.050	224.602	237.063	190.217	213.537	205.362	373.129	529.167
Gastos amortizables	152.343	160.036	231.465	143.777	94.410	89.443	74.418	26.663	15.389	28.057	116.596
Circulante	924.969	1.287.547	1.347.206	1.307.744	1.146.357	1.128.697	1.136.355	1.149.215	1.302.288	1.361.994	1.452.710
Pasivo											
Recursos propios	412.469	468.084	538.922	678.645	783.908	936.197	966.231	1.086.547	1.219.259	1.262.300	1.721.216
Financiación ajena a medio y largo plazo	1.249.734	1.490.823	1.721.567	1.244.318	1.465.400	1.330.881	1.228.224	1.045.057	1.024.705	1.097.750	1.431.257
Financiación a corto plazo	917.684	1.191.425	1.241.654	1.670.127	1.149.702	1.208.359	1.204.959	1.284.564	1.409.795	1.705.556	1.599.900
Total activo/pasivo	2.578.887	3.150.332	3.502.143	3.593.120	3.399.010	3.475.437	3.399.414	3.416.168	3.653.759	4.065.606	4.752.373

Fuente: TAFUNELL, Xavier, “Empresa y bolsa” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 10.25 y elaboración propia.

Tabla 61. Evolución del número de efectivos del Instituto Nacional de Industria, 1982-1989

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
INI Servicios Centrales	657	705	661	665	654	639	610	
Grupo INI	219.829	216.698	210.335	198.747	169.396	163.221	155.945	151.674

Fuente: JORDANA, Jacint y RAMIÓ, Carles, “Gobierno y administración” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 13.22 y elaboración propia.

Tabla 62. Previsión del impacto sobre el empleo industrial por Comunidades Autónomas, según el Programa de Reconversión Industrial, 1981-1985

	nº	%	% activos industriales
Andalucía	3.816	5,82	1,4
Asturias	6.072	9,27	5,7
Cantabria	1.948	2,97	4,4
Cataluña	11.716	17,88	1,39
C. Valenciana	8.080	12,33	1,9
Galicia	3.391	5,17	1,92
Madrid	13.653	20,85	3,71
Navarra	722	1,1	1,3
País Vasco	14.260	21,77	4,56
Otros	1.856	2,84	
Total	65.514	100	

Fuente: FERNÁNDEZ GARCÍA, Aladino, “La Reconversión industrial en España: Impacto regional y transformaciones espaciales”, y elaboración propia.

Tabla 63. Distribución regional de los excedentes de empleos de los sectores declarados en reconversión, 1985

	Excedentes 31/3/1985	Excedentes totales previstos
País Vasco	13.392	18.204
Cataluña	6.762	8.309
Asturias	5.505	11.280
Galicia	5.398	6.011
Andalucía	3.500	4.600
Madrid	4.450	10.500
Cantabria	5.054	6.261
Baleares	1.177	1.380
Navarra	910	940
Murcia	1.360	1.580
Extremadura	45	55
Canarias	11	11
La Rioja	200	255
Aragón	296	70
Castilla-La Mancha	250	405
Castilla-León	15	15
C. Valencia	155	210
Total	48.978	69.636

Fuente: FERNÁNDEZ GARCÍA, Aladino, “La Reconversión industrial en España: Impacto regional y transformaciones espaciales”, y elaboración propia.

Tabla 64. Proyectos aprobados por las Comisiones Gestoras de las ZUR (no desistidos hasta 30/IV/1988)

	Asturias	Barcelona	Cádiz	Galicia-Ferrol	Galicia-Vigo	Madrid	Nervión	Total	ZPLI Sagunto
Proyectos									
nº	114	172	36	36	99	72	88	619	71
%	18,4	27,8	5,8	5,8	16	12	14,2	100	
Inversión									
Millones ptas.	23.627,80	69.381,50	29.949,30	12.852,20	15.069,90	72.580,80	33.205,80	256.667,30	31.852,00
%	9,2	27	11,7	5	5,90	28,3	12,9	100	
(A) Puestos tbjo. a crear									
nº	1.973	4.911	2.116	864	1.767	3.796	1.876	17.301	2.381
%	11,4	28,4	12,2	5	10,2	21,9	10,9	100	
(B) Puestos tbjo. fer. B/A									
FPE	762	2.841	906	516	1.008	1.526	1.020	8.579	1.035
%	38,6	57,8	42,8	59,8	57	40,2	54,3	49,4	43,5
Subvención (mill. ptas.)	4.465,80	10.647,60	3.529,80	2.810,10	3.042,20	11.609,60	4.449,20	40.554,30	4.763
Inv/Proy. (mill. ptas)	207,2	403,3	831,9	357	152,2	980,8	377,2	414,7	448,6
Inversión/empleo	11,9	14,1	14,1	14,9	8,5	19,1	17,7	14,7	13
Subvención empleo	2,2	2,1	1,6	3,2	1,7	3,2	2,3	2,3	2

Fuente: FERNÁNDEZ GARCÍA, Aladino, “La Reconversión industrial en España: Impacto regional y transformaciones espaciales”, y elaboración propia.

Tabla 65. Realización de proyectos en las zonas declaradas ZUR (hasta el 30/IV/1988)

	Asturias	Barcelona	Cádiz	Galicia-Ferrol	Galicia-Vigo	Madrid	Nervión	Total
Inversión								
Mill. ptas	9.434	36.683	12.254	4.281	6.421	41.315	18.895	129.373
% aprob.	39,9	52,8	40,9	33,3	42,6	56,9	57,1	50,4
P.T. totales contratados								
nº	946	3.160	298	275	842	1.734	942	8.197
% a crear	47,9	64,3	14	31,9	47,6	45,6	50,2	47,3
P.T. nº	99	175	147	21	314	164	361	1.281
F.P.E. % ofert.	12,9	6,1	16,2	4	31,3	10,7	35,3	14,9

Fuente: FERNÁNDEZ GARCÍA, Aladino, “La Reconversión industrial en España: Impacto regional y transformaciones espaciales”, y elaboración propia.

Tabla 66. Ajuste laboral de la reconversión minera en Asturias, 1991-1993

	Plantilla inicial	Ajuste laboral	Plantilla final	Excedentes s/plant. Inicial
HUNOSA	18.500	5.990	12.510	32,4
M. FIGAREDO	1.515	334	1.181	22
MPS CAMOCHA	1.496	330	1.166	22,1
HULLASA	260	260	0	100
Total empresas (Contrato programa)	21.771	6.914	14.857	31,8

Fuente: RUIZ-VALDEPEÑAS, Henar Pascual, “Reconversión y reestructuración industrial en Asturias”, y elaboración propia.

Tabla 67. Empresas públicas privatizadas en España, 1985-1996 (no incluye OPVs)

	Empresa	Propietario	Sector	% vendido	Comprador
1985	Textil Tarazona	INI	Textil	69,6	Cima Enursa (Entrecanales)
1985	Ingenasa	INI (Enisa)	Inmun/genética	67,7	ERT
1985	Igfisa	INI (Endiasa)	Alimentación	100	Pleamar
1985	Cesquisa	INI (Enisa)	Química	45,4	Cepsa
1985	Secoinsa	INI	Electrónica	69,1	Fujitsu España/Telefónica
1985	SKF Española	INI	Rodamientos	98,8	Aktiebogalet SKF
1985	Marsans	INI	Turismo	100	Trapsatur
1985	Gossypium	DGPE/Intelhorce	Textil	100	Textil Guadiana
1986	Entursa	INI	Turismo	100	CIGA/Hoteles de Lujo Españoles
1986	Frigsa	INI (Endiasa)	Alimentación	100	Saprogal
1986	Gypisa	INI (Endiasa)	Alimentación	100	Frig. Santana / Los Norteños
1986	La Luz	INI (Carcesa)	Alimentación	100	Prevert
1986	Insisa	INI (BWE)	Bienes de Equipo	60	Acctas. Privados de Incisa
1986	Remetal	INI (Inespal)	Aluminio	66,6	Socios Fundadores de Remetal
1986	Issa	INI (Inespal)	Aluminio	100	Aluper fil
1986	Aluflet	INI (Alúmina Esp.)	Aluminio	40	Acctas. Privados Aluflet
1986	Motores MBD	INI (Motores Barreras/Sodiga)	Construcción naval	60	Klockner Humboldt Deutz AG
1986	Pamesa	INI (Ence)	Papel	100	Torras Hostench
1986	Fovisa	INI (Made)	Siderurgia	100	Genakor (GKN/Acenor)
1986	Indugasa	INI (Seat)	Automoción	50	GKN
1986	Seat	INI	Automoción	100	Volkswagen
1986	Telesincro	INI (Inisel)	Electrónica	100	Bull
1987	Dessa	INI (Bazán / Astano)	Construcción naval	80	Forestal del Atlántico
1987	Evatsa	INI (Inespal/Sodiga)	Aluminio	100	Cebal

1987	Litofan	INI (Inespal)	Aluminio	100	Baumgartner Ibérica
1987	Alumalsa	INI (Inespal)	Aluminio	44	Montuper
1987	Purlator	INI (INI/ Casa)	Aluminio	97,4	Knecht Filterwerke
1987	Victorio Luzuriaga	INI	Automoción	33,3	Eisenwerk Bruhl
1987	Diasa	INI (Endiasa)	Alimentación	50	Saudisa (Promodes) / BBV
1987	Miel Española	INI (Endiasa)	Alimentación	51	Sugemesa (Agrolimen)
1987	Miraflores	INI (Lac. Castellana)	Alimentación		Queserías Miraflores
1989	Astican	INI	Construcción naval	90,72	Italmar
1989	MTM	INI	Bienes de Equipo	100	GEC Alsthom
1989	Ateinsa	INI	Bienes de Equipo	100	GEC Alsthom
1989	Enfersa	INI	Fertilizantes	100	Ercros
1989	Oesa	INI (Endiasa)	Alimentación	100	Ferruzi
1989	Pesa	INI (Inisel)	Electrónica	97,4	Amper
1989	Ancoal	INI (Enisa)	Aluminio	75,2	Omnium Industrie
1990	Adaro Indonesia	INI (Enadimsa)	Ingeniería	80	Indonesia Coal/ Asminco Bara Utama/Tirtamas Majutamas/Iveco/Fiat
1990	Hytasa	DGPE	Textil	100	Textil Guadiana
1990	Imepiel	DGPE	Calzado	100	DFG Grupo Cusi
1990	Dirsa	DGPE (Tabacalera)	Distribuciones	75,06	Diasa (Promodes/BBV)
1990	Seb. de la Fuente	DGPE	Distrivuciones Dirsa	100	Cofidisa
1990	Salinas de Torre vieja	DGPE	Sal	38,5	U. Salinera de España (Solvay)
1990	Coifer	DGPE (Tabacalera)	Alimentación	50	Alimentos Naturales (BBV)
1991	Enasa	INI	Automoción	100	Iveco
1991	Gr. Empr. Álvarez	INI	Artesanía Industrial	100	Iveco
1991	TSD	INI (Enosa)	Electrónica	100	Telepublicaciones
1991	Fridarago	DGPE (Tabacalera)	Alimentación	100	Rústicas
1991	Coisa	DGPE (Tabacalera)	Alimentación	100	Rústicas
1991	Jobac	Mercasa	Distribuciones	100	Erosmes Comsum. (Eroski)

1992	Icuatro	INI (Iniexport)	Equip. Hospit.	90	Grupo Alegre
1993	Automoción 2000	INI (Teneo)	Automoción	100	Inversores Reo
1993	Fábrica S. Carlos	INI (Teneo)	Bienes de Equipo	100	Grupo Navacel/Total Technical Trade/Luis Tellería Usabiaga
1993	Palco	INI (Inespal)	Aluminio	100	Alcan Deutschland
1993	Royal Brands, S.A.	DGPE (Tabacalera)	Alimentación	98,93	RJR Alimentación, S.L. (50% de Tabacalera)
1993	Ineco	Renfe	Ingeniería	66	
1994	C. Trasatlántica	INI (Teneo)	Tpte. Marítimo	100	Naviera de Odiel/Marítima Valenciana
1994	Artespaña	INI (Teneo)	Artesanía Industrial	100	Medino, S.L.
1994	ASDL	INI (Ceselsa)	Aeronáutica	87,7	Quadrant Group
1994	Sodiga	INI	Sociedad de Desarrollo Industrial	51,2	Xunta de Galicia
1994	Enagas	INH	Gas	91	Gas Natural
1994	Caivsa	INH	Gas	100	Gas Natural
1994	RJR Alimentación	DGPE (Tabacalera)	Alimentación	10,7	RJR Nabisco
1995	Refinalsa	INI (Inespal)	Aluminio	50	Remetal
1995	Sidenor	AIE	Siderurgia	50	Digeco-Roda (Digeco/Olarra/Rodaccial)
1995	Lesa	DGPE (Tabacalera)	Alimentación	100	Leyma/Iparlat

Fuente: GÁMIR, Luis, “Política de privatizaciones en España”, y elaboración propia.

Tabla 68. Privatización y reestructuración de las empresas del INH, 1981-1990

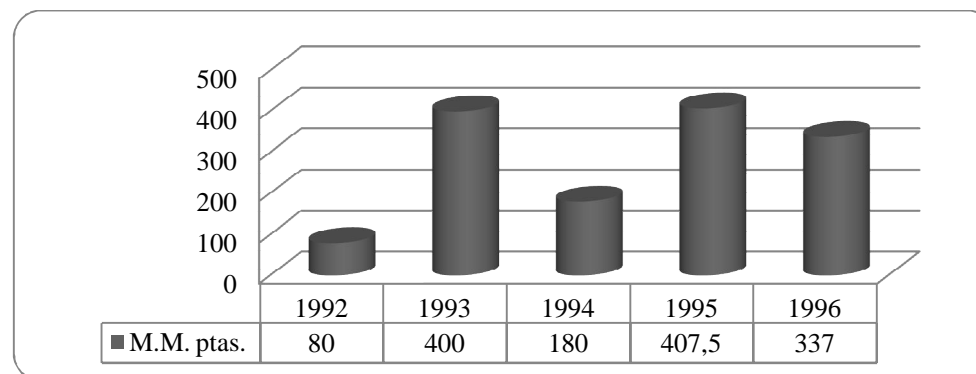
	HISPANOIL	EMP	ENAGAS
Reestructuración			
Año	1985	1985	1982
Destino	Fusión con ENIEPSA	Fusión con PETROLIDER	Adquisición por el INH
Privatización			
Año	1989	1989	
Destino	Venta en Bolsa del 26% de Repsol	Venta en Bolsa del 26% de Repsol	
	BUTANO	CAMPSA	ALCUDIA
Reestructuración			
Año	1984	1986	1986
Destino	INH aumenta su participación del 50 al 100%	Absorción por el INH	Fusión de ALCUDIA, CALATRAVA, MONTORO Y PAULAR
Privatización			
Año	1989	1989	1989
Destino	Venta en Bolsa del 26% de Repsol	Venta en Bolsa del 26% de Repsol	Venta en Bolsa del 26% de Repsol

Fuente: SANCHIS, Juan Alberto, “Privatización y eficiencia en el sector público español”, y elaboración propia.

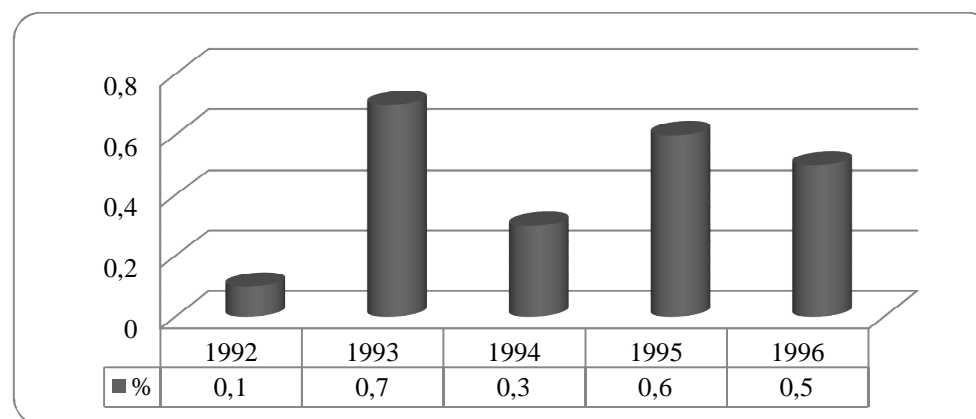
Tabla 69. Ingresos del Estado mediante OPV, 1986-1996

	Capital (%)	Fecha	Carácter OPV	Comisiones	Importe (mill. ptas.)
Gesa	38	1986	Institucional		9.000
Acesa	29	1987	Institucional y minoritario		22.000
Telefónica-87	6	1987	Institucional		47.000
Ence-87	40	1987	Institucional		18.000
Endesa-88	18	May-88	Institucional y minoritario	4,5	80.000
Repsol-89	26	May-89	Institucional y minoritario	3,5	150.000
Repsol	8	Jun-92	Bonos convertibles		80.000
Repsol-93	13	Mar-93	Institucional	3	110.000
Argentaria-93-I	25	Abr-93	Institucional y minoritario	3,5	110.000
Argentaria-93-II	25	Nov-93	Institucional y minoritario	3,25	180.000
Endesa-94	10	Jun-94	Institucional y minoritario	3	180.000
Repsol-95	19	Abr-95	Institucional y minoritario	3	200.800
Ence-95	18	Oct-95	Institucional		11.700
Telefónica-95	12	Oct-95	Institucional y minoritario	2,95	195.000
Repsol-96	11	Feb-96	Institucional y minoritario	2,95	130.000
Argentaria-96	25	Mar-96	Institucional y minoritario	2,95	170.000
Total				2,99	1.693.500

Fuente: GÁMIR, Luis, “Política de privatizaciones en España”, y elaboración propia.

Gráfico 15. Ingresos por privatizaciones en relación al PIB anual (miles de millones de ptas.)

Fuente: GÁMIR, Luis, “Política de privatizaciones en España”, y elaboración propia.

Gráfico 16. Ingresos por privatizaciones en relación al PIB anual (%)

Fuente: GÁMIR, Luis, “Política de privatizaciones en España”, y elaboración propia.

Tabla 70. Índice de Producción Industrial, 1982-1992 (1929-1931=100)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
IPI	1.530	1.571	1.585	1.617	1.667	1.744	1.796	1.877	1.877	1.864	1.813

Fuente: INE (CNAE-74. Base 1990), y elaboración propia.

Tabla 71. Estructura económica-financiera y empleo de las empresas públicas y privadas españolas, 1989-1996

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
ESTRUCTURA PATRIMONIAL								
Inversión en Inmovilizado Material respecto a Inm. Mat. Neto								
Empresas públicas	18,1	19,5	17,9	11,5	9,5	8,8	9,9	10,3
Empresas privadas	10,5	11,8	11,7	11,5	9,6	8,5	11,8	12,9
Total	13,7	15,1	14,6	11,5	9,5	8,7	10,9	11,5
Ratio de endeudamiento								
Empresas públicas					53,4	51,9	46,5	44,3
Empresas privadas					47,6	44,8	42,9	38,3
Total					50,1	47,9	44,5	41,1
EMPLEO								
Número medio de trabajadores								
Empresas públicas	423,9	423,1	417,2	413,7	397,3	381,3	442,3	434,5
Empresas privadas	1.072,60	1.058,60	1.041	986,1	956,6	977,3	1.079,70	1.107,90
Total	1.496,50	1.481,60	1.458,20	1.399,70	1.353,90	1.358,50	1.522	1.542,30
Sueldos y salarios por trabajador (tasas de crecimiento)								
Empresas públicas	11,7	7,5	9,7	9,4	4,5	4	4,8	4,5
Empresas privadas	10,1	9,3	7,6	7,5	4,7	4,2	2,9	2,5
Total	10,5	8,7	8,2	8,1	4,6	4,1	3,4	3
Remuneración de asalariados por trabajador (miles ptas.)								
Empresas públicas					5.229,60	5.448,80	5.136	5.517,40
Empresas privadas					4.387,80	4.435,20	4.448	4.508,20
Total					4.628,80	4.719,70	4.647,90	4.792,90

Fuente: MELLE HERNÁNDEZ, Mónica, “Algunos resultados efectivos de las privatizaciones en España: Una primera aproximación”, y elaboración propia.

Tabla 72. Evolución de la productividad sectorial y de las empresas reestructuradas del INH y del INI, 1980-1990

	ATEINSA	CARCESA	ENASA	ENCE	ENDESA	ENFERSA	ENHER	ENSIDESA	ERZ	FRIDARAGO	GESA	GRUPO LESA	IBERIA
Año reestructuración	1984	1984	1981	1987	1984	1985	1983	1986	1986	1984	1983	1984	1981-1982
5 años antes													
Empresa	0,64	0,9	0,09	1,51	1,76	1,38	1,35	0,88	1,7	0,43	1,21	1,36	0,55
Sector	0,11	1,23	0,54	0,67	1,48	1,13	1,47	1,17	1,4	0,46	1,34	1,39	
5 años después													
Empresa	0,47	1,52	0,39	1,92	1,97	1,34	1,66	1,01	1,8	0,8	1,05	1,65	0,67
Sector	0,37	1,31	0,76	0,92	1,33	1,29	1,29	1,49	1,39	0,61	1,34	1,52	
Año de privatización	1988	1988	1989	1988	1988	1988				1988	1986	1988	
3 años antes													
Empresa	0,37	1,53	0,8	1,87	1,95	1,29				0,68	1,14	1,64	
Sector	0,32	1,3	1,08	0,85	1,31	1,25				0,64	1,38	1,53	
3 años después													
Empresa	0,39	1,74	0,72	1,89	2,08	1,39				1,38	1,03	1,94	
Sector	0,47	1,42	1,15	0,94	1,44	1,4				0,7	1,26	1,57	

Tabla 72 (cont.). Evolución de la productividad sectorial y de las empresas reestructuradas del INH y del INI, 1980-1990

	IBERIA	INESPAL	INESEL	MTM	SEAT	ALCUDIA	BUTANO	CAMPSA	EMP	ENAGAS	HISPANOIL
Año reestructuración	1981-1982	1985	1985	1984	1980	1986	1984	1986	1985	1982	1985
5 años antes											
Empresa	0,55	1,32	0,99	0,42	0,4	1,96	1,96	0,58	2,91	3,08	4,62
Sector		1,59	0,82	0,16	0,53	1,57	1,98	2,99	3,03	1,79	2,94
5 años después											
Empresa	0,67	1,49	1,41	0,02	0,45	2,41	1,94	1,52	2,92	3,41	3,37
Sector		1,77	1,33	0,34	0,61	1,96	1,82	2,78	2,85	2,01	2,79
Año de privatización				1988	1986	1989	1989	1989	1989		1989
3 años antes											
Empresa				0,02	0,55	2,47	1,95	1,26	2,92		3,37
Sector				0,38	0,67	2,61	1,6	2,77	2,86		2,79
3 años después											
Empresa				0,03	1,14	2,59	2,12	2,24	2,9		3,07
Sector				0,51	1,09	2,5	1,94	2,82	2,82		2,4

Fuente: SANCHIS, Juan Alberto, “Privatización y eficiencia en el sector público español”, y elaboración propia.

Tabla 73. Principales características de las viviendas construidas, 1982-1992 (unidades)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Viviendas por construir	246.906	248.906	218.301	235.754	232.907	346.338	382.752	387.801	275.317	248.442	264.661
Viviendas protegidas											
Iniciadas	135.104	138.170	120.331	142.221	122.752	101.527	75.373	54.526	48.568	43.858	47.309
Terminadas	139.199	138.679	134.053	129.020	123.896	119.681	112.500	84.857	60.863	46.373	46.373
Viviendas libres											
Iniciadas	90.964	91.849	80.171	80.481	92.231	151.347	194.102	228.777	190.823	160.633	160.623
Terminadas	103.726	91.711	67.951	62.838	73.005	86.354	128.518	152.802	220.256	227.173	177.602
Total de viviendas											
Iniciadas	226.068	226.068	200.502	222.702	214.803	252.874	269.475	283.303	239.391	204.491	207.932
Terminadas	242.925	242.925	202.004	191.858	196.901	206.035	241.018	237.659	281.119	273.546	220.929

Fuente: TAFUNELL, Xavier, “Urbanización y vivienda” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 6.10 y elaboración propia.

Tabla 74. Parque de viviendas en Madrid y en Barcelona, junto al total, 1960-2001

	1960	1970	1981	1991	2001
Viviendas familiares					
Madrid	669,6	1.132,70	1.710,40	1.934,70	2.497,30
Barcelona	667,2	1.183,60	1.762,00	1.904,70	2.243,30
Total	7.710,50	10.655,80	14.726,10	17.206,40	20.823,40
Viviendas principales ocupadas					
Madrid	59,5	947,30	1.336,70	1.503,70	1.885,80
Barcelona	628,9	1.000,60	1.373,80	1.488,60	1.766,40
Total	7.061,10	8.504,30	10.430,90	11.736,40	14.270,70

Fuente: TAFUNELL, Xavier, “Urbanización y vivienda” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 6.7 y elaboración propia.

Tabla 75. Evolución del precio del m² de la vivienda nueva, 1980-1992

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Precio m² de la vivienda nueva	1,9	3,9	2,5	2,5	4,6	6,5	8,9	28,9	23,3	23,2	19,3	12,4	-9

Fuente: Banco de España, y elaboración propia.

Tabla 76. Evolución de los precios de la vivienda nueva en Barcelona, 1982-1992 (pesetas de 1996)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Ptas/m ²	95.206	89.791	91.566	92.201	98.348	137.315	200.593	229.841	237.892	255.236	252.900

Fuente: MAS HERNÁNDEZ, Rafael y RODRÍGUEZ CHUMILLAS, Isabel, “El mercado inmobiliario en España”, y elaboración propia.

Tabla 77. Tipología de viviendas según el régimen de tenencia, 1981-2001 (miles)

	1981	1991	2001		1981	1991	2001
En propiedad							
Principales	7.629,70	9.194,50	11.550,30	Facilitada			
Secundarias	1.602,20	4.204,00		Principales	321,6	525,90	
Por compra				Secundarias	18,4	321,90	
Totalmente pagada				En alquiler			
Principales	5.763,80	6.184,50		Principales	2.168,70	1.780,70	1.615,90
Secundarias	1.476,70	2.789,50		Secundarias	146,3	617,80	
Con pagos pendientes				Otra forma			
Principales	1.865,80	1.833,30		Principales	311	235,3	916,7
Secundarias	125,60	462,70		Secundarias	132,9	326,4	
Por herencia o donación				Total de viviendas familiares clasificadas			
Principales		1.176,70		Principales	10.430,97	11.736,46	14.082,90
Secundarias		942,80		Secundarias	1.899,87	5.470,06	

Fuente: TAFUNELL, Xavier, “Urbanización y vivienda” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 6.8 y elaboración propia.

Tabla 78. Indicadores del sector inmobiliario, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Fincas urbanas enajenadas											
Número	857.816	956.491	900.842	899.428		986.856	1.060.963	1.198.165	1.103.126	1.080.695	985.476
Capital (millones de ptas. corrientes)	909.472	1.371.512	1.401.708	1.649.623		2.218.567	2.871.687	4.054.370	4.881.149	4.758.922	5.481.898
Préstamos constituidos con hipotecas sobre fincas urbanas											
Número	95.915	121.232	103.166	101.008		255.020	301.073	343.905	308.965	307.828	355.862
Capital (millones de ptas. corrientes)	397.652	452.415	459.889	495.584		1.098.063	1.574.550	2.253.971,00	2.302.604	2.356.053	2.889.177

Fuente: TAFUNELL, Xavier, “Urbanización y vivienda” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 6.11 y elaboración propia.

Tabla 79. Entidades de crédito: cajas de ahorro e instituciones financieras no bancarias, 1982-1992 (datos a fin de año, en millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Nº de cajas	80	81	79	78	78	78	78	77	65	56	53
Nº de oficinas	9.571	10.065	10.440	10.797	11.061	11.754	12.252	13.168	13.720	14.031	14.291
Depósitos	6.401.372	6.401.372	7.374.975	8.777.196	10.137.710	11.787.017	14.289.883	16.774.322	18.256.934	20.498.745	22.713.699
Créditos	3.035.026	3.750.042	3.635.354	3.993.274	4.701.950	5.910.784	7.388.667	8.905.706	10.120.743	12.058.097	14.038.557

Fuente: MARTÍN ACEÑA, Pablo y PONS, M^a Ángeles, “Sistema monetario y financiero” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 9.13 y elaboración propia.

Tabla 80. Distribución porcentual de la capitalización de los valores de renta variable oficialmente admitidos en la Bolsa de Madrid, según su cotización a fin de año, por sectores económicos, 1976-1996

	1976	1981	1986	1991	1996
Bancos y financieras	43	44,1	31,1	31,1	29
Eléctricas	17,8	20,7	24	17,7	28,9
Alimentación, bebidas y tabaco	1,4	1,3	3,2	4,9	2,8
Construcción	5,6	5,7	7,3	13,1	4,4
Inversión mobiliaria	6	5,2	5,3	6,3	2,5
Siderometalúrgica	3,6	3	4,2	4,1	2,9
Químico-Textil	6,8	5,6	5,9	9,6	8,6
Comunicaciones	11,2	9,4	15,2	9,9	14,3
Restantes	4,7	5,1	3,9	3,4	6,6
Total valor efectivo (ptas.)	1.642.361	1.625.260	6.447.320	14.302.881	31.579.507

Fuente: TAFUNELL, Xavier, “Empresa y bolsa” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 10.32 y elaboración propia.

Tabla 81. Evolución del número de visitantes entrados en España, 1982-1992 (miles de personas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Número de visitantes	42011,1	41263,3	42931,7	43235,4	47388,8	50544,9	54178,2	54057,6	52044,1	53495	55330,7
Incremento anual											
(miles)	1881,8	-747,8	1668,4	303,7	4153,4	3156,1	3633,3	-120,6	-2013,5	1450,9	1835,7
(%)	4,7	-1,7	4	0,7	9,6	6,7	7,2	-0,1	-3,6	2,8	3,4

Fuente: BOTE GÓMEZ, Venancio, “El desarrollo del turismo en España: cambio de rumbo y oportunidades científicas”, y elaboración propia.

Tabla 82. Evolución del número de turistas, ingresos y pagos por turismo exterior, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986
Ingresos por turismo. Contabilidad Nacional					
Millones de pesetas de 1986	1.255.971,00	1.365.035,00	1.529.954,00	1.534.672,00	1.685.768,00
Millones de pesetas corrientes	735.509,00	1.203.497,00	1.268.173,00	1.338.324,00	1.685.768,00
Ingresos por turismo mundial (millones de \$)	100.907,00	1.102.474,00	112.707,00	118.084,00	143.475,00
Número de turistas					
España (miles de personas)	37.651,00	37.089,00	39.004,00	39.672,00	43.744,00
Mundo (miles de personas)	286.097	298.618	316.357	327.188,00	338.854
Cuota de España turismo mundial (%)	13,2	12,8	12,3	12,1	12,9
Exportaciones de servicios turísticos sobre el PIB (%)	4,19	4,67	5,24	5,24	5,67
	1988	1989	1990	1991	1992
Ingresos por turismo. Contabilidad Nacional					
Millones de pesetas de 1986	1.752.190,00	1.619.118,00	1.479.265,00	1.570.979,00	1.608.525,00
Millones de pesetas corrientes	1.972.965,00	1.951.886,00	2.024.167,00	2.303.143,00	2.497.351,00
Ingresos por turismo mundial (millones de \$)	204.290,00	221.263,00	268.928,00	277.568,00	315.103,00
Número de turistas					
España (miles de personas)	49.759,00	50.912,70	49.744,70	50.023,10	51.630,60
Mundo (miles de personas)	384.810,00	426.461	458.229	463.951	503.356
Cuota de España turismo mundial (%)	12,6	11,9	10,6	10,8	10,3
Exportaciones de servicios turísticos sobre el PIB (%)	5,23	4,6	4,01	3,86	4,09

Fuente: TENA, Antonio, "Sector exterior" en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 8.10 y elaboración propia.

Tabla 83. Evolución de los principales indicadores del turismo en España, 1975-1992

	1970-1975	1976-1982	1983-1987	1988-1992
Ingresos por turismo (% PIB)	4,9	4	5	4,1
Gasto medio real por turista (ptas.)	60.226	50.799	58.552	48.926
Número de pernoctaciones por viajero (media)	5,7	6,3	6,6	6,1
Cuota turismo español área mediterránea (ingresos)	29,6	22,9	26,5	26
Cuota turismo español mundo (ingresos)	9,1	7,3	8,1	8
Cuota turismo español mundo (viajeros)	14,6	13,3	13,1	11,3
Saldo balanza turista (% PIB)	3,9	3	4,3	3,2
Tasas de variación medias				
Ingresos por turismo	3,7	2,9	6,9	-1,9
PIB	5,2	1,5	3	3,3
Entrada viajeros	6,5	2,7	5,8	1,9
Gasto medio por turista	-2,6	0,2	1,1	3

Fuente: BUISÁN, Ana, “Exportaciones de turismo y competitividad”, y elaboración propia.

Tabla 84. El turismo internacional como cobertura de la balanza de pagos, 1982-1992 (miles de millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Ingresos	787,6	990	1247,8	1347,7	1671,9	1825,8	1944,3	1924,3	1878,4	1991,1	2265,1
Pagos	111,6	128,6	135	170	210,4	241,4	286,2	364,8	429,3	473,4	566
Saldos	676	861,4	112,8	1204,7	1461,5	1584,4	1658,1	1559,5	1449,1	1517,7	1699,1
Saldo Balanza Comercial	-1149,9	-1201,6	-761,9	-991,9	-770,1	-1393,5	-1887,6	-2902	-2963,8	-3159,2	-3088,4
Ingreso Turismo / Saldo Balanza Comercial	68,5	82,4	82,4	138,6	217,1	131	103	66,3	63,4	63	73,3
Saldo Turismo / Balanza Comercial	58,8	71,7	71,7	121,5	189,8	113,7	87,8	53,7	48,9	48	55

Fuente: BOTE GÓMEZ, Venancio, “El desarrollo del turismo en España: cambio de rumbo y oportunidades científicas”, y elaboración propia.

Tabla 85. Evolución del gasto en I+D en porcentaje del PIB en España y en la UE, 1986-1996

	España	UE-15
1986	0,57	1,86
1987	0,6	1,89
1988	0,67	1,89
1989	0,7	1,91
1990	0,79	1,92
1991	0,81	1,87
1992	0,85	1,85
1993	0,85	1,84
1994	0,79	1,8
1995	0,79	1,78
1996	0,8	1,78

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 86. Evolución de la estructura del gasto en I+D, 1985-1995

	1985	1990	1995
Gasto en I+D (% PIB)	43	45,4	48,9
Gasto público en I+D (% PIB)	40,7	54,5	51,3
Gasto privado en I+D (% PIB)	27,3	40,8	44,2
Patentes solicitadas en la EPO	8,1	13,3	16,4
Stock de capital tecnológico (% PIB)	30,8	38,9	49,6

Fuente: Banco de España (Síntesis de indicadores de Convergencia Real), y elaboración propia.

Tabla 87. Balanza tecnológica española en millones de pesetas y porcentaje de cobertura, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Ingresos	15.707,20	18.265,40	20.780,00	23.378,00	24.994,00	20.289,00	21.219,00	34.194,00	40.785,00	66.427,00	90.253,90
Pagos	79.983,70	88.337,70	84.742,00	93.814,00	103.816,00	111.092,00	160.654,00	190.446,00	221.854,00	236.138,00	357.296,00
Saldo	-64.276,50	-70.072,30	-63.962,00	-70.436,00	-78.822,00	-90.803,00	-139.425,00	-156.252,00	-181.069,00	-169.711,00	-267.042,10
Cobertura (%)	20	21	25	25	24	18	13	18	18	28	25

Fuente: PATRICIO SÁIZ, J., “Investigación y desarrollo: patentes” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 11.9 y elaboración propia.

Tabla 88. Patentes registradas en España: solicitudes, concesiones y residencia del titular, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Solicitudes	10.205	9.854	10.702	11.372	10.231	4.310	4.025	4.405	3.297	2.902	2.637
Concesiones	7.941	8.814	8.219	9.115	8.736	7.280	5.077	6.053	3.499	2.314	2.549
Residentes	1.635	1.500	1.782	2.189	1.649	1.720	1.816	2.087	2.218	2.156	2.053
No residentes	8.570	8.354	8.920	9.183	8.582	2.590	2.209	2.318	1.079	746	584

Fuente: PATRICIO SÁIZ, J., “Investigación y desarrollo: patentes” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 11.1 y elaboración propia.

Tabla 89. Patentes registradas según los sectores con más probable uso de la tecnología, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Agricultura y ganadería	116	157	139	136	148	117	79	127	92	43	25
Minería y energía	642	657	635	501	585	532	339	469	216	153	167
Industria	5.635	6.294	5.693	6.863	6.287	5.164	3.467	3.633	1.967	1.213	1.312
Transportes y comunicaciones	611	602	602	598	602	467	338	578	404	245	348
Construcción	233	272	240	236	215	161	159	290	240	137	237
Servicios	675	823	896	773	888	838	695	950	580	343	460

Fuente: PATRICIO SÁIZ, J., “Investigación y desarrollo: patentes” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 11.8 y elaboración propia.

Tabla 90. Evolución de los Costes Laborales Unitarios Reales en España y en la UE, 1982-1996 (1991=100)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
España	106,6	106,2	101,5	98,7	96,5	96,9	96,7	96	98,5	100	101,8
UE	106,4	104,7	103,2	102,4	101,6	101,4	100,2	99,4	99,7	100	100,3

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 91. Costes salariales unitarios de España en comparación con la UE-12 y Estados Unidos, 1980-1996 (Base 1991=100)

	1980	1982	1984	1986	1988	1991	1992	1994	1996
España	43,5	54,2	63,6	71,8	80,1	100	108	113,2	118,9
UE-12	58,7	69,4	76,3	82,4	87,3	100	104,3	107,1	110,7
Estados Unidos	65,3	76	79,6	84,1	90,2	100	101,8	105,3	107,7

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.27 y elaboración propia.

Tabla 92. Evolución de los Costes Laborales Unitarios, según sus tasas de variación anual, en España y en la UE, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
ESPAÑA	11,4	11,5	6	5,5	8,5	6,3	5,8	6,1	10,1	8,6	8,7
UE-15	8,6	6,7	4,9	4,8	4,1	3,6	3,2	4,3	6,1	5,5	4,5

Fuente: INE, Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 93. Evolución de la tasa anual de creación de empleo y tasa anual de desempleo en España y en la UE, 1982-1992 (%)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Tasa anual creación empleo											
España	-0,9	-0,3	-2,2	-1	2,3	4,8	3,5	3,6	3,8	1,2	-1,4
UE	-0,8	-0,4	0,2	0,5	0,8	1,3	1,7	1,8	1,7	0,3	-1,3
Tasa anual de desempleo											
España	15,9	17,3	20,1	21,5	21	20,2	19,2	17,2	16,2	16,3	18,4
UE	8,2	8,6	9,2	9,4	9,3	9,2	8,6	7,8	7,3	7,6	8,4

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 94. Evolución del coste laboral real, el coste laboral unitario y la productividad a partir de la base de datos del Modelo Hermin-España, 1982-1992. Tasas de variación anual (%)

	Coste laboral real	Coste laboral unitario	Productividad
1982	4,16	2,29	1,83
1983	3,15	0,71	2,42
1984	-1,56	-4,86	3,47
1985	2,48	-1,22	3,75
1986	0,93	-0,44	1,38
1987	0,37	-0,26	0,63
1988	1,24	-0,15	1,39
1989	-0,82	-1,67	0,86
1990	1,8	1,85	-0,05
1991	1,83	1,04	0,78
1992	4,51	2,59	1,87

Fuente: BAJO, Óscar y MONÉS, M^a Antonia, *Curso de macroeconomía*, cuadro 4, y elaboración propia.

Tabla 95. Estructura factorial del VAB a coste de los factores, 1977-1996 (% de cada factor respecto al VAB)

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Rentas del Trabajo	56,1	55,6	55,6	54,9	55,3	54,5	54,5	51,9	51,2	51,5
Consumo de capital fijo	12,7	12,5	13,1	13,6	14,6	14,8	15,4	15,7	15,8	15,1
Rentas públicas	2,4	2,1	2	1,9	2,4	2,7	2,6	1,9	2,2	2
Excedente neto de explotación	28,9	29,8	29,4	29,7	27,6	27,9	27,5	30,5	30,8	31,4
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Rentas del Trabajo	51,7	51,8	52,6	54,3	55,6	56,5	56,5	56,4	55	54,1
Consumo de capital fijo	14,6	14,4	14	13,8	13,7	13,7	13,7	14,2	14,2	14,1
Rentas públicas	1,6	1,5	1,2	1,8	2,5	2,5	2,5	4,2	2,6	1,8
Excedente neto de explotación	32,3	32,3	32,3	30	28,1	28,1	27,3	25,2	28,2	30

Fuente: CARRERAS, Albert, PRADOS de la ESCOSURA, Leandro y ROSÉS, Joan R., “Renta y Riqueza” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 17.14 y elaboración propia.

Tabla 96. Evolución comparada en porcentaje del PIB de las remuneraciones salariales y el excedente bruto de explotación en España, 1985-1992

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Remuneración asalariado	51,2	51,3	50,4	50,1	47,3	46,2	45,1	45,1	45,2	45,1	47,8	48,7	48,9
EBE	44,2	43,4	44,3	44	46,5	46,8	46,2	46,3	46,7	46,4	44,03	43,1	42,3

Fuente: INE, y elaboración propia.

Tabla 97. Evolución comparada de la participación ajustada de los salarios en porcentaje del PIB en España y en la UE, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
España	73,3	73,6	70,8	69,3	67,8	67,7	67,2	66,8	68,4	69,4	71,2
UE	75	74	72,9	72,3	71,5	71,5	70,8	70,3	70,7	71,7	71,3

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 98. Cuentas consolidadas del Sector Público español: Ingresos y Gastos Públicos (% del PIB)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1. Impuestos indirectos (a la producción e importaciones)	7,3	8	8,5	9,1	10,3	10,4	10,5	10,4	10,2	10,3	10,8
2. Impuestos directos (sobre la renta y el patrimonio)	6,5	7,5	7,9	8,1	7,9	9,8	10	11,6	11,5	11,4	11,9
3. Contribuciones sociales	12,9	13,2	12,5	12,6	12,4	12,4	12,2	12,5	12,8	13,1	14
4. De las que son contribuciones sociales efectivas											
5. Otros ingresos corrientes	4,4	4,2	3,7	4,1	4	3,7	3,7	3,3	3,6	4,1	4
6. Total ingresos corrientes	31	32,9	32,6	34	34,6	36,3	36,3	37,8	38,2	38,9	40,7
7. Consumo Público	13,5	14	13,8	14,1	14,1	14,5	14,1	14,5	14,9	15,5	16,4
8. Del que son retribuciones a empleados públicos	9,7	10,1	9,9	10,1	9,9	9,9	10	10,2	10,6	11	11,7
11. Transferencias sociales (prestaciones económicas)	13	13,4	13,3	13,7	13,4	13,2	13,3	13,4	13,8	14,6	15,4
12. Intereses de la deuda	0,6	0,8	1,2	1,9	3,7	4,2	3,3	3,9	3,9	3,7	4,2
13. Subsidios											2,5
14. Otros gastos corrientes											
15. Total gastos corrientes	30	31,2	31,8	33,7	34,8	35,4	34,5	35,6	36,5	37,7	40
16. Ahorro bruto	0,9	1,6	0,8	0,3	-0,3	0,9	1,8	2,2	1,7	1,2	0,7
17. Transferencias de capital recibidas											
18. Ingresos totales	31	32,9	32,6	34	34,6	36,3	36,3	37,8	38,2	38,9	40,7
19. Formación bruta de capital	2,9	2,7	2,9	3,6	3,5	3,3	3,7	4,3	4,8	4,7	4
Otros gastos de capital											
21. Gastos totales	35,8	36,9	37,3	40,1	40,1	39,9	39,6	41,3	42,3	43,2	44,6
22. Presión fiscal	26,7	28,7	29	30	30,9	32,9	32,9	34,7	34,8	35,1	36,8
23. Capacidad (+) ó necesidad (-) financiación	-5,2	-4,5	-5,2	-6,1	-5,5	-3,7	-3	-3,5	-4,1	-4,3	-4
24. Saldo cíclicamente ajustado	-4,4	-3,6	-4	-4,9	-4,5	-3,6	-3,9	-4,9	-5,8	-5,8	-4,8
25. Deuda pública	25,4	30,6	41,9	43,2	43,6	43,6	40	41,4	43,2	43,9	46,8

Fuente: INE (SEC-95), Eurostat, MULAS GRANADOS, Carlos [et al.], “La política presupuestaria en España (1978-2003)”, y elaboración propia.

Nota: Los totales para SEC-94 se obtienen de la siguiente manera:

Línea 6= Línea 1+Línea 2+ Línea 3+Línea 5

Línea 15= total Líneas 7 a 14

Línea 16= Línea 6-Línea 15

Línea 18= Línea 6+Línea 17

Línea 21= Línea 15+Línea 19+Línea 20

Línea 23= Línea 18-Línea 21

Tabla 99. Estructura básica del Sector Público en España y comparación de la deuda pública con la UE, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Ahorro público (% PIB)	-0,4	0,2	-0,6	-1	-0,1	1,7	1,5	2,6	2,1	1,3	0,9
Cap. ó nec. de financiación AAPP (% PIB)	-5,2	-4,4	-5,1	-6,3	-5,3	-2,9	-3,6	-3,1	-3,9	-0,4	-3,9
Saldo primario (% PIB)	-4	-2,7	-2,7	-2,9	-1,3	1,1	0,4	0,8	0,2	-0,2	0,7
Deuda pública (% PIB)	25,6	30,9	37	42,2	43,6	43,9	40,2	41,7	43,6	44,3	46,8
Deuda pública UE (% PIB)	45	48,2	51,1	53,2	54,1	55,3	54,4	53,5	54,4	56,2	54,9

Fuente: Banco de España, INE (SEC-95), Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 100. Déficit presupuesto e inversión pública, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Déficit públicos	-5,4	-4,6	-5,2	-6,2	5,5	-3,7	-3,3	-3,5	-4,2	-4,3	-4
Inversión pública	2,9	2,7	2,9	3,6	3,5	3,3	3,7	4,3	4,9	4,7	4

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 101. Gasto público, ingresos públicos, saldo presupuestario y deuda pública por lustros en España y en la UE, 1976-1995 (% del PIB)

	1976-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995
Gasto público				
España	27,84	36,98	40,98	45,38
UE-15	44,24	48,78	47,76	50,06
Ingresos públicos				
España	26,5	31,94	36,92	39,76
UE-15	41,18	44,06	44,44	44,94
Saldo presupuestario				
España	-1,34	-5,02	-4,04	-5,62
UE-15	-3	-4,74	-3,28	-5,1
Deuda pública				
España	14,08	31,32	42,66	54,9
UE-15	36,25	47,78	54,34	63,1

Fuente: Eurostat, BAJO, Óscar, “El marco de la política fiscal en España: sostenibilidad del déficit e implicaciones de la UEM”, y elaboración propia.

Tabla 102. Gastos del Estado: clasificación económica, 1982-1992 (miles de millones de ptas.)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Compras netas de bienes y servicios	168,7	182,9	201,2	211,2	254,1	300,3	296,9	341,4	336,2	343,9	322,6
Sueldos y salarios	1.099,70	1.198,50	11.151,30	1.316,50	1.457,20	1.576,10	1.729,80	1.920,50	2.153,80	2.382,60	2.472,20
Intereses	79,9	184,1	369,7	775	1.059,40	1.034,40	1.165,70	1.326,40	1.473,40	1.817,30	1.999,70
Transferencias Corrientes	1.539,70	2.040,10	2.425	2.622,50	3.175,80	3.902,80	4.305,60	5.060,20	5.542,70	5.910,20	7.500,50
Ahorro	-395,2	-211,1	-478,2	-635,3	-566,40	-204,20	-107,10	111,40	59,10	33,20	18,80
Formación bruta de capital fijo	309,20	451,80	397,8	439,1	447,90	589,70	656,50	789,70	944,40	1.251,30	803,90
Transferencias de capital	562,1	605,2	611,2	722,60	737,80	791,10	947,40	991,10	1.091,20	955,20	897,20
Necesidad de financiación	1.136,10	1.075,50	1.339,10	1.704,70	1.672,90	1.277,50	1.194,90	1.481,40	1.734,90	1.296	1.689,70

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.17 y elaboración propia.

Tabla 103. Saldo presupuestario liquidado del Estado, 1977-1996 (millones de ptas.)

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Millones de Ptas.	-86.626	-315.205	-236.223	-415.298	-452.937	-1.019.280	-892.681	-1.444.477	-1.625.443	-1.478.222
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Millones de Ptas.	-1.196.600	-1.298.740	-1.008.800	-1.387.400	-1.621.000	-1.629.500	-3.617.500	-3.836.200	-3.098.600	-3.386.079

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.24 y elaboración propia.

Tabla 104. Deuda pública total en circulación, 1982-1992 (miles de millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Interior amortizable en circulación	376,8	489	550,1	1.097,10	1.170,00	3.066,00	3.387,50	4.338,70	4.554,00	5.146,00	7.224,00
Interior perpetua	10,7	10,7	10,6	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Deuda total del Estado en circulación	1.480,50	1.835,40	1.912,70	2.631,00	3.260,70	5.134,70	5.296,70	4.686,30	4.849,20	5.411,00	7.641,10
Deuda del Tesoro	210	115	1.310,00	3.675,40	5.100,00	6.007,70	7.924,70	8.872,40	11.012,20	11.796,40	10.785,90
Deudas especiales interiores	138,9	246,2	240,4	437,60	477,00	348,00	353,70	420,20	326,10	373,20	403,70
Créditos del Banco de España				659,00	2.149,00	1.522,50	1.198,00	941,00	1.156,00	2.145,00	2.304,00
Cédulas para inversiones	1.093,00	1.220,70	1.352,00	1.532,30	2.080,00	2.058,00	1.898,50	336,90	284,50	254,30	406,40
Créditos concedidos en el extranjero	541,4	832,7	1.200,70	1.476,90	801,00	548,00	505,00	512,50	581,00	789,80	1.037,60
Deuda pública total en circulación	2.370,80	3.029,10	4.663,80	8.879,90	11.787,70	13.560,90	15.278,10	15.432,40	17.924,50	20.515,40	22.172,30

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.34 y elaboración propia.

Tabla 105. Cuadro general sobre los ingresos totales y los ingresos fiscales del Estado, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Ingresos totales (% PIB)	30,6	32,6	32,6	34	34,6	36,3	36,3	37,9	38,2	39,1	40,8
Ingresos fiscales (% PIB)	28,5	30,6	31	31,8	31,1	32,6	32,2	34	33,9	34	35,9
Impuestos indirectos	9,4	10,2	10,8	11,3	11,1	10,8	10,4	10,4	10,1	10	10,6
Impuestos directos	6,1	7	7,4	7,6	7,3	9,2	9,3	10,8	10,7	10,7	11,1
Cotizaciones sociales	12,8	13,2	12,6	12,6	12,4	12,4	12,2	12,5	12,8	13,1	13,9
Impuestos de capital	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Fuente: INE, Banco de España, y elaboración propia.

Tabla 106. Selección de ingresos del Estado: clasificación económica, 1982-1992 (miles de millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Impuestos indirectos	1.111,80	1.388,90	1.529,00	1.675,00	1.976,00	2.840,00	3.098,00	3.318,00	3.665,00	3.272,20	4.004,70
Impuestos directos	1.028,90	1.342,30	1.584,00	1.744,00	1.965,00	2.186,00	3.195,00	3.570,30	4.733,40	5.157,60	5.696,40
Monopolios	250	262,4	197	197	262	271	208,9	216,7	277,1	320,4	551,1
Otros ingresos corrientes	539,9	574	653	653	757	610	660	710,9	825,2	872,2	872,7
Rentas corrientes	2.930,60	3.568,00	3.963,00	4.369,00	4.960,00	5.907,00	7.161,80	7.815,90	9.500,70	10.077,90	11.217,60
Impuestos sobre el capital	20,10	23,60	15,60	15,60	12,50	9,20	8,10	21,30	17,30	1,60	0,90
Emisión de Deuda pública de largo plazo	237,00	180,00	662,00	654,00	886,00	1.848,90	148,70	1.022,00	287,00	755,00	2.409,00

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.16 y elaboración propia.

Tabla 107. Selección de la evolución de algunos de los impuestos directos principales del Estado, 1982-1992 (miles de millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Impuesto sobre sociedades	236,6	300,9	348,2	432	540,3	791,3	832,7	1.300,40	1.493,60	1.404,00	1.330,00
Contribución general sobre la renta	893	1.092,20	1.377,90	1.491,30	1.593,90	2.328,60	2.655,70	3.332,00	3.548,70	4.148,10	4.863,60
Impuesto sobre el patrimonio	13,5	13,4	8,9	9,7	9,2	12,3	16,8	16,3	18,9	20,1	22

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.10 y elaboración propia.

Tabla 108. Evolución del número de declaraciones del Impuesto de Sucesiones y de número de declaraciones del IRPF, junto con el % entre ambas, 1982-1992.
Régimen General y Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
RÉGIMEN GENERAL											
Nº de Impuestos de Sociedades	489.884	542.472	601.048	676.002	781.410	887.640	753.634	855.743	974.625	1.034.092	863.224
Nº de declaraciones IRPF	6.227.068	6.414.466	6.574.692	7.096.647	7.895.805	8.027.658	8.953.866	9.843.817	10.975.073	11.583.933	12.341.301
%	7,8	8,5	9,1	9,5	9,9	11,1	8,4	8,7	8,9	8,9	7
Álava											
Nº de Impuestos de Sociedades											4.665
Nº de declaraciones IRPF											127.642
%											3,6
Guipúzcoa											
Nº de Impuestos de Sociedades											
Nº de declaraciones IRPF							14.118	15.226	17.267	17.905	15.132
%							205.465	222.677	241.078	252.578	265.474
Vizcaya							6,9	6,8	7,2	7,1	5,7
Nº de Impuestos de Sociedades						28.357	24.918	25.762	26.845	27.900	23.060
Nº de declaraciones IRPF						323.486	367.269	389.723	420.115	447.762	470.952
%						8,8	6,8	6,6	6,4	6,2	4,9

Fuente: ENCISO de YZAGUIRRE, Vicente, “Efectos no deseados por la aplicación de los criterios de valoración del Impuesto sobre el Patrimonio”, y elaboración propia.

Tabla 109. Evolución de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 1982-1992 (millones de euros corrientes)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Recaudación ISSD	126,71	166,53	188,44	204,78	240,4	307,33	417,43	439,48	534	410,73	509,44

Fuente: NAREDO, José Manuel y CARPINTERO, Óscar, *El balance nacional de la economía española 1984-2000*, y elaboración propia.

Tabla 110. Calendario de cesión de impuestos a las CCAA de régimen común

	Patrimonio	Sucesiones y donaciones	Transmisiones Patrimoniales	Actos jurídicos documentados	Tasas sobre juego
Andalucía	1984	1984	1984	1984	1984
Aragón	1984	1984	1984	1988	1986
Principado de Asturias	1986	1986	1987	1987	1986
Illes Balears	1986	1986	1986	1988	1999
Canarias	1984	1984	1984	1988	1984
Cantabria	1986	1986	1986	1988	
Castilla y León	1985	1985	1985	1988	1985
Castilla-La Mancha	1985	1985	1987	1988	1985
Cataluña	1982	1982	1982	1988	1982
Comunidad Valenciana	1984	1984	1984	1988	1984
Extremadura	1984	1985	1984	1988	1984
Galicia	1984	1984	1984	1988	1984
Comunidad de Madrid	2002	1990	1990	1997	2003
Región de Murcia	1986	1986	1986	1988	1986
La Rioja	1986	1986	1986	1988	1986

Fuente: ALONSO OLEA, Eduardo J., “La federalización de una Hacienda centralista en un país no federal: España, 1845-2008”, y elaboración propia.

Nota: No se incluye el País Vasco ni Navarra.

Tabla 111. Evolución de algunos parámetros fiscales básicos en España y en la OCDE, 1980-1995

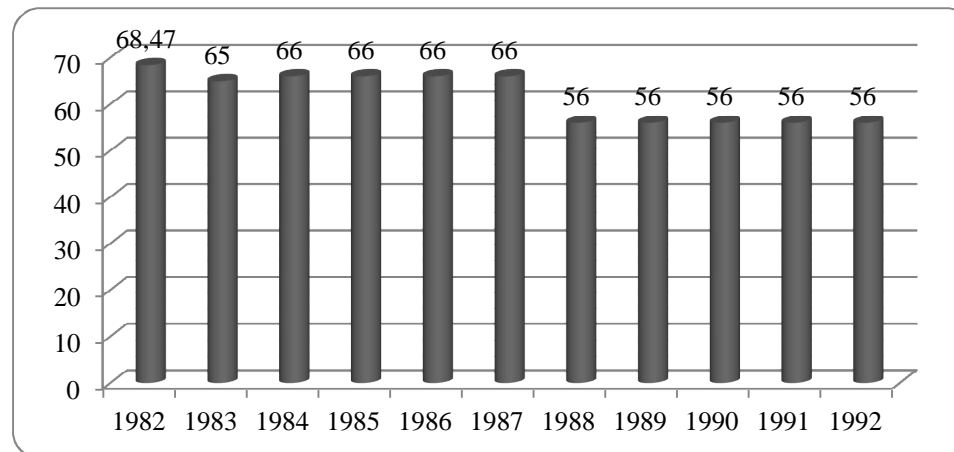
	1980	1990	1995	Evolución
Tipo marginal máximo IRPF				
España	65	56	56	-9
OCDE	63	51	49	-14
Tipo marginal mínimo IRPF				
España	15	25	20	5
OCDE	15	18	20	5
Número de tramos IRPF				
España	28	16	16	-12
OCDE	14	6	5	-9
Tipo estándar del Impuesto sobre sociedades				
España	35	35	35	0
OCDE	45	38	35	-10
Tipo estándar IVA				
España		12	16	4
OCDE	17,5	18,3	18,4	0,9
Participación impositiva sobre total ingresos				
IRPF				
España	20,4	21,7	23,6	3,2
OCDE	31,3	29,3	27	-4,3
Imposición Directa				
España	3	3	3	4,1
OCDE	4	4	4	9,2

Tabla 111 (cont.). Evolución de algunos parámetros fiscales básicos en España y en la OCDE, 1980-1995

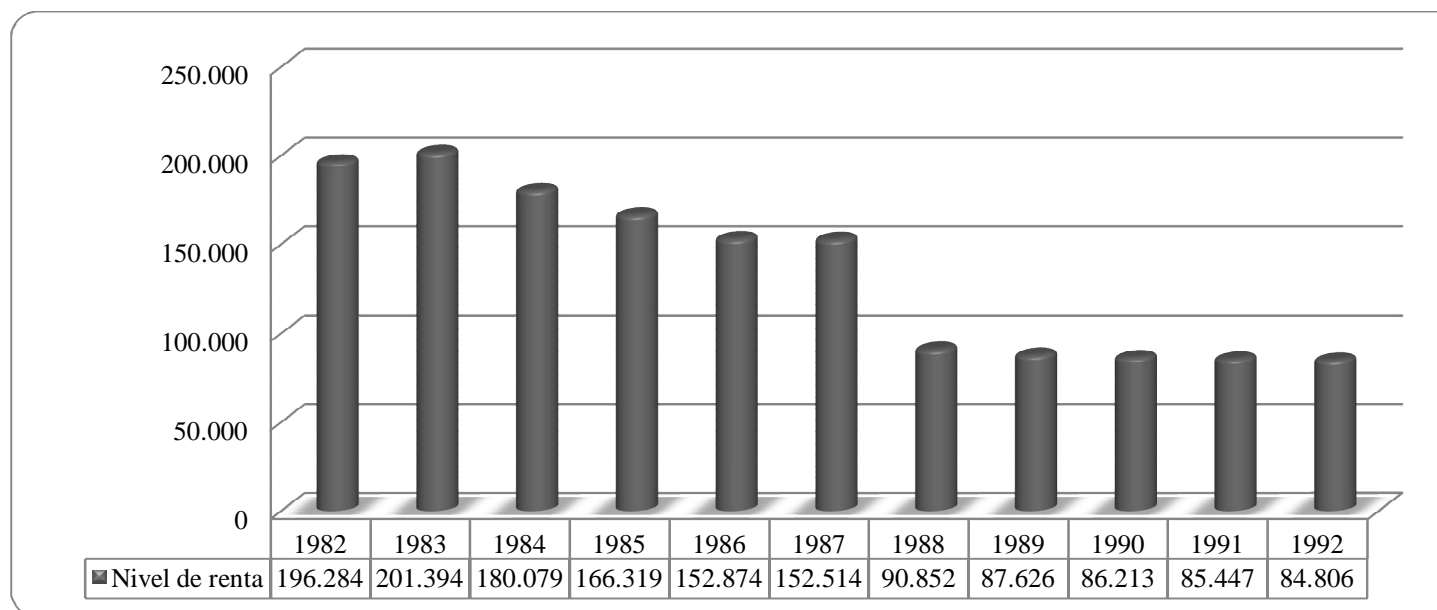
IVA	1980	1990	1005	Evolución
España	0,6	6,1	4,7	15,9
OCDE	3,5	3	0,6	0
Imposición Indirecta				
España		1	1	7,9
OCDE		1	1	2,7
Presión fiscal				
España				9,9
OCDE				4

Fuente: RÍO OTERO, Coral del [et al.], “La política fiscal en España durante el periodo 1982-1996”, y elaboración propia.

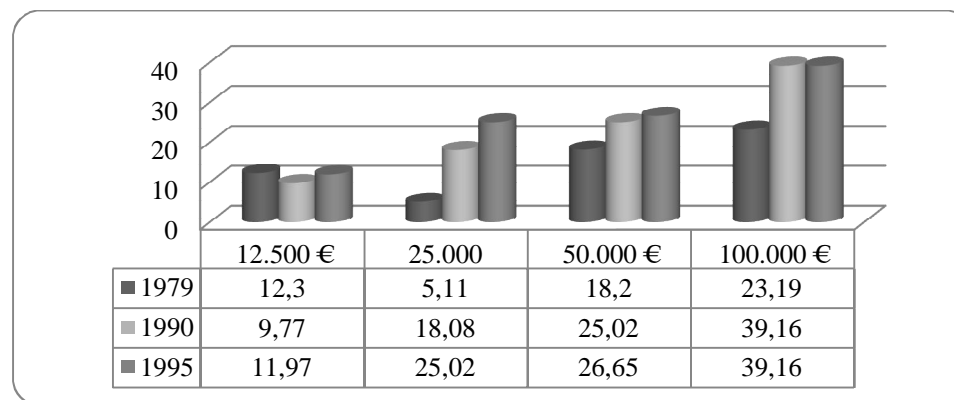
Gráfico 21. Evolución del mínimo máximo del IRPF en España, 1982-1992



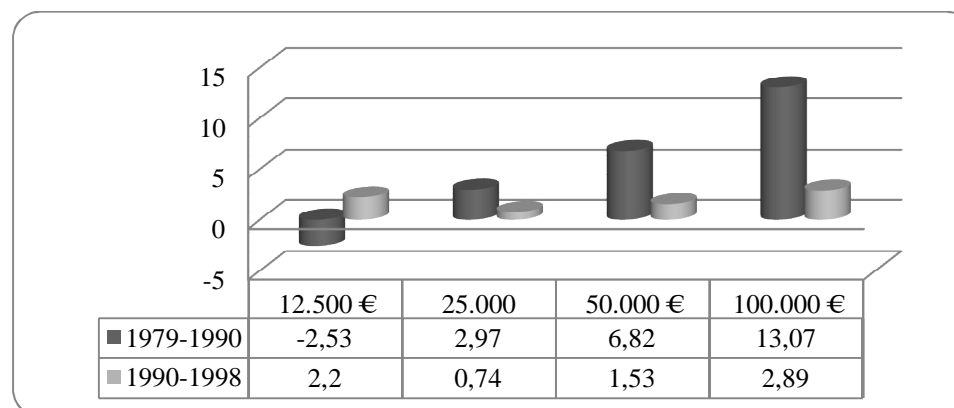
Fuente: DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M., “Inflación e Impuesto sobre la Renta: Aspectos teóricos y análisis del caso español”, y elaboración propia.

Gráfico 22. Nivel de renta a partir de la aplicación del tipo máximo del IRPF, 1982-1992

Fuente: DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M., “Inflación e Impuesto sobre la Renta: Aspectos teóricos y análisis del caso español”, y elaboración propia.

Gráfico 23. Evolución de los tipos medios en el IRPF para rendimientos del trabajo con poder adquisitivo constante, 1979-1995 (euros de 2004)

Fuente: DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M., “Inflación e Impuesto sobre la Renta: Aspectos teóricos y análisis del caso español”, y elaboración propia

Gráfico 24. Variación del tipo medio del IRPF por niveles de renta con poder adquisitivo constante (euros 2004)

Fuente: DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M., “Inflación e Impuesto sobre la Renta: Aspectos teóricos y análisis del caso español”, y elaboración propia

Tabla 112. Número de declaraciones del IRPF y presentación de los resultados del efecto redistributivo del IRPF, 1982-1992. Índice de Gini (V=2)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Número declarantes	123.599	130.500	134.957	145.664	165.303	173.979	193.444	208.808	235.646	251.197	277.733
(a)Desigualdad de la renta antes de impuestos	0,217	0,1926	0,2425	0,2583	0,2893	0,3164	0,3244	0,3257	0,3366	0,3404	0,3011
(b) Desigualdad de la renta después de impuestos	0,1841	0,1613	0,2023	0,2139	0,2399	0,2612	0,2653	0,2639	0,2722	0,2764	0,2394
(c) Desigualdad de la renta después de impuestos estimada	0,1822	0,1603	0,2009	0,2121	0,2375	0,2583	0,2622	0,2605	0,268	0,2716	0,2357
RE [Efecto Redistributivo] (a) – (b)	0,0259	0,0267	0,0309	0,0343	0,0358	0,0382	0,0416	0,0434	0,0441	0,0439	0,0456
RV [Redistribución Vertical] (a) – (c)	0,0267	0,0274	0,0315	0,0353	0,0368	0,391	0,0427	0,0445	0,0451	0,0449	0,0465
% sobre RE	103,1	102,6	101,9	102,9	102,8	102,4	102,6	102,5	102,3	102,3	102
IH [Iniquidad Horizontal]	0,0008	0,0007	0,0006	0,0010	0,0010	0,0009	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010	0,0009
%sobre RE	3,1	2,6	1,9	2,9	2,8	2,4	2,6	2,5	2,3	2,3	2

Fuente: Panel de declarantes del IRPF del IPE, PERROTE, Irene, “Redistribución en la imposición de la renta personal: El caso español”, y elaboración propia.

Tabla 113. Selección de la evolución de algunos de los impuestos indirectos principales del Estado, 1982-1992 (miles de millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Renta de aduanas	227,9	272,1	295,8	360,5	219,7	346,4	382,5	378,3	336,1	289,7	209,1
Timbre del Estado	252,7	346	563	614,5	209,8	64,9	52,8	44,4	38,1	26	27,2
Impuesto de emisión y negociación de valores mobiliarios	60,7	76	69,6	77,6	75,7	100,4	53,7	32,5	42,6	42,7	42,4
Impuestos especiales sobre el consumo	241,8	298,9	425,4	446,6	502,6	709,5	766,9	838,7	984,8	1.244,50	1.440,40
Impuestos sobre el lujo	166,9	198,3	195,1	198,8	37,5						
Impuesto sobre el Valor Añadido					1.399,50	1.824,80	2.063,70	2.370,70	2.524,30	2.737,90	3.230,50

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.11 y elaboración propia.

Tabla 114. Tipos de impositivos del IVA, 1986-1992

	1-1-1986 / 31-12-1991	1-1-1992 / 31-7-1992	1-08-1992 / 31-12/1992
Tipo reducido	6%		
Tipo general	12%	13	15
Tipo incrementado	33%		
Tanto alzado de compensación	4%		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 115. Evolución de la recaudación de los impuestos sobre el consumo en porcentaje del PIB, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Bienes y Servicios	5,4	6,4	7,1	8	9,8	9,6	9,7	9,6	9,4	9,5	9,8
Producción y Venta	5,4	6,4	7,1	7,7	9,4	9,2	9,3	9,1	8,8	8,8	9
Generales	3	3,3	3,9	4,1	5,3	5,3	5,4	5,6	5,3	5,3	5,7
IVA					4,4	5	5,2	5,4	5,2	5,2	5,6
Especiales	2,4	3,1	3,3	3,6	4,2	3,9	3,9	3,6	3,5	3,5	3,4
Utilización				0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 116. Evolución de la recaudación de los impuestos sobre el consumo como porcentaje del total de imposición, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Bienes y Servicios	22,07	23,96	25,51	28,71	33,21	30,59	30,83	28,81	28,39	28,36	28,36
Producción y Venta	22,06	23,95	25,51	27,68	31,94	29,28	29,42	27,35	26,53	26,34	26,19
Generales	12,4	12,28	13,86	14,67	17,73	16,9	17,15	16,68	18,03	15,89	16,45
IVA					14,76	16,03	16,42	16,29	15,73	15,59	16,19
Especiales	9,67	11,67	11,65	13,02	14,21	12,38	12,27	10,67	10,5	10,45	9,73
Utilización				0,62	0,81	1,24	1,36	1,41	1,79	1,93	2,07

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 117. Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 del Impuesto sobre el Valor Añadido como porcentaje del PIB, 1982-1992

	1965	1975	1975	1980	1985	1995	2000	2001	Variación
OCDE	0,5	2	3	3,5	3,9	5,9	6,6	6,5	6
OCDE Europa	0,7	2,6	3,9	4,5	5	6,9	7,5	7	6,3
UE-15	0,8	2,7	4,4	5,2	5,6	6,9	7,4	6,8	6
Alemania		5,5	5,2	6,2	5,9	6,7	7	6,7	6,7
Francia	6,9	8,7	8,3	8,5	8,6	7,5	7,5	7,3	0,3
Reino Unido			3,1	5,2	6	6,6	6,9	6,8	6,8
España						5,2	6,2	6	6
Japón						1,4	2,4	2	2

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 118. Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 del Impuesto sobre el Valor Añadido como porcentaje total de imposición, 1965-2001

	1965	1975	1975	1980	1985	1995	2000	2001	Variación
OCDE	1,61	5,84	8,1	9,77	10,77	16,12	17,54	17,46	15,85
OCDE Europa	2,03	7,38	10,66	11,39	12,79	18,05	19,05	17,34	15,31
UE-15	2,57	7,77	12	13,22	13,5	17,48	18,02	15,81	13,24
Alemania		17,14	14,63	16,63	15,81	17,44	18,37	18,52	18,52
Francia	20,07	25,46	23,1	20,88	19,68	16,99	16,49	16,2	-3,87
Reino Unido			8,91	14,66	15,88	19	18,37	18,25	18,25
España						15,85	17,6	17,06	17,06
Japón						5,21	8,89	19,6	

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 119. Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos sobre el consumo como porcentaje del PIB, 1965-2001

	1965	1970	1975	1980	1985	1995	2001	Variación
OCDE	9,7	10	9,7	10,1	10,9	11,4	11,5	1,8
OCDE Europa	10,3	10,8	10,4	10,9	11,8	12,4	12,1	1,8
UE-15	10,4	10,8	10,2	11	12	12,2	11,9	1,5
Alemania	10,4	10,3	9,5	10,2	9,5	10,7	10,6	0,2
Francia	13,3	13	11,9	12,4	13	12,1	11,4	-1,9
Reino Unido	10,1	10,7	8,8	10,3	11,9	12,3	11,7	1,6
España	6	5,8	4,5	4,8	48	9,4	10,2	4,2
Estados Unidos	5,6	5,5	5,3	4,8	4,9	4,9	4,7	-0,9
Japón	4,8	4,5	3,7	4,1	3,8	4,2	3,9	-0,9

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 120. Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos sobre el consumo como porcentaje total de imposición, 1965-2001

	1965	1975	1975	1980	1985	1995	2001	Variación
OCDE	38,05	35,61	23,63	32,34	33,54	32,31	31,84	-6,2
OCDE Europa	40,05	37,98	33,28	31,95	33,01	32,68	30,34	-9,7
UE-15	38,18	36,08	31,36	31,05	31,55	31,1	28,7	-9,5
Alemania	32,97	31,81	26,9	27,11	25,65	27,98	29,28	-3,7
Francia	38,41	38,13	33,29	30,42	29,67	27,44	25,18	-13,2
Reino Unido	33,07	28,78	25,02	29,2	31,53	35,42	31,24	-1,8
España	40,84	35,87	24,16	20,69	28,71	28,62	28,32	-12
Estados Unidos	22,76	19,95	19,55	17,63	18,82	17,87	15,72	-7
Japón	26,25	22,36	17,31	16,34	14,02	15,17	18,87	-7,4

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 121. Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos sobre consumos específicos como porcentaje del PIB, 1965-2001

	1965	1975	1975	1980	1985	1995	2000	2001	Variación
OCDE	5,8	5,5	4,8	4,8	4,9	4,5	4,2	4	-1,8
OCDE Europa	6,2	5,8	5	4,9	4,9	4,8	4,3	4	-2,2
UE-15	6	5,6	4,6	4,6	4,9	4,6	4,2	3,9	-2,1
Alemania	4,6	4,2	3,8	3,5	3,3	3,6	3,3	3,5	-1,4
Francia	4,9	4	3,2	3,4	3,8	4	3,7	3,5	-1,4
Reino Unido	7,7	7,4	5,2	4,7	5,2	5,1	4,7	4,4	-3,3
España	2,7	2,5	1,6	2,4	3,6	3,4	3,4	3,3	0,6
Estados Unidos	3,7	3,3	2,7	2,2	2,2	2,1	1,9	1,9	-1,8
Japón	4,6	4,2	3,2	3,5	3,3	2,2	2,1	1,6	-3

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 122. Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos sobre consumos específicos como porcentaje total de imposición, 1965-2001

	1965	1975	1975	1980	1985	1995	2000	2001	Variación
OCDE	24,07	20,46	17,54	16,57	16,05	13,08	11,78	11,4	-12,67
OCDE Europa	25,24	21,46	16,82	15,14	13,97	12,4	11,13	9,99	-15,25
UE-15	22,92	19,07	14,55	13,78	13,33	11,84	10,33	0,5	-13,42
Alemania	14,62	12,29	10,8	9,27	8,75	9,49	8,81	9,61	-5,01
Francia	14,28	11,63	9	8,38	8,75	9,14	8,18	7,81	-6,47
Reino Unido	25,21	19,92	14,82	13,28	13,85	14,58	12,44	11,76	-13,45
España	18,42	15,48	8,72	10,53	13,02	10,27	9,77	9,29	-9,13
Estados Unidos	15,14	11,74	10,03	8,28	8,4	7,66	6,32	6,32	-8,82
Japón	25,02	20,95	15,09	14,13	12,08	7,98	7,79	15,45	-9,57

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 123. Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos generales sobre el consumo como porcentaje del PIB, 1965-2001

	1965	1975	1975	1980	1985	1995	2000	2001	Variación
OCDE	3,3	4	4,3	4,8	5,4	6,3	6,9	6,9	3,6
OCDE Europa	3,7	4,5	5	5,6	6,4	7,1	7,7	7,4	3,7
UE-15	3,8	4,6	5,1	5,9	6,5	7	7,5	7,3	3,5
Alemania	5,2	5,5	5,2	6,2	5,9	6,7	7	6,7	1,5
Francia	8	8,7	8,4	8,6	8,7	7,6	7,7	7,6	-0,4
Reino Unido	1,8	2,5	3,1	5,2	6	6,6	6,9	6,8	5
España	3,3	3,3	2,9	2,3	4,1	5,2	6,2	6	2,7
Estados Unidos	1,2	1,6	1,9	1,9	2	2,2	2,2	2,2	1
Japón						1,4	2,4	2	2

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 124. Evolución comparada de España con los países de la OCDE y la UE-15 de los impuestos generales sobre el consumo como porcentaje del total de imposición, 1965-2001

	1965	1975	1975	1980	1985	1995	2000	2001	Variación
OCDE	11,85	13,06	13,34	14,17	15,79	17,54	18,34	18,51	6,66
OCDE Europa	12,99	14,62	15,03	15,61	17,59	18,83	19,42	18,27	5,28
UE-15	13,28	14,95	15,25	16,02	16,68	17,75	18,22	17,58	4,3
Alemania	16,49	17,14	14,63	16,63	15,81	17,44	18,37	18,52	2,03
Francia	23,26	25,51	23,4	21,14	19,95	17,34	16,92	16,66	-6,6
Reino Unido	5,91	6,83	8,91	14,66	15,88	19,08	18,37	18,25	12,34
España	22,21	20,29	15,3	10,16	14,67	15,87	17,6	17,06	-5,15
Estados Unidos	4,8	5,85	7,04	7,02	7,88	8	7,45	7,45	2,65
Japón						5,21	8,89	19,6	19,6

Fuente: OCDE, y elaboración propia.

Tabla 125. Comportamiento del gasto público a través de sus principales partidas presupuestarias, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Gasto público (% PIB)	35,8	37	37,7	40,3	39,9	39,2	39,9	41,1	42,1	43,5	44,6
Educación				3,6	3,6	3,8	3,8	3,9	4	4,2	4,3
Sanidad				4,4	4,3	4,4	4,5	4,8	4,9	5,2	5,7
Seguridad Social				14	13,6	13,3	13,4	13,3	14,1	15	15,9
Resto				18,3	18,4	17,8	18,1	19,1	19,1	19,1	18,7

Fuente: INE, Banco de España, y elaboración propia.

Tabla 126. Evolución comparada a nivel internacional del gasto social en España por lustros, 1980-1995

	1980	1985	1990	1995
UE-15	22,3	24,2	24,4	27,1
Nórdicos	27,3	28,7	29,6	31,2
Continental	25,2	26,4	25,4	28,2
Anglosajones	20,3	22,9	21,7	26,4
Mediterráneos	17,1	20,1	21,7	22,7
España	17,1	19	19,3	21,4
Grecia	12,4	18,5	21,5	21,5
Italia	18,2	21,4	23,7	23,9
Portugal	11	12,8	14,3	19,8
Posición de España	13	13	13	13

Fuente: Eurostat, MÉNDEZ, Idelfonso, “El gasto público en bienestar social y los modelos de bienestar”, y elaboración propia.

Tabla 127. Gastos corrientes de Protección Social por naturaleza, función y tipo de prestaciones, 1982-1992. Cuentas Integradas en términos SEEPROS (miles de millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Función vejez	1.173,50	1.395,90	1.619,80	1.843,40	2.090,80	2.310,20	2.542,30	2.838,10	3.222,30	3.636,80	4.056,60
Supervivencia	374,4	432,3	485,6	544,7	610,3	670,6	742,3	857,3	989,1	1.122,60	1.272,00
Invalidez	295,9	344,6	404,9	453,5	514,9	574,7	654,6	750,7	828,3	894,5	1.003,80
Enfermedad y atención sanitaria	1.033,90	1.147,30	1.271,40	1.416,40	1.595,90	1.811,70	2.077,90	2.396,60	2.791,70	3.320,50	3.825,40
Desempleo	613	731,6	841,6	1.038,80	1.094,80	1.190,40	1.294,60	1.444,40	1.692,60	2.113,30	2.286,00
Familia e hijos	131,8	136,9	142,5	142,60	144,50	148,00	153,70	166,20	173,80	190,60	241,60
Vivienda		1,2	3,7	5,20	9,30	25,80	46,50	61,10	68,80	58,90	49,30
Otras prestaciones sociales	60,6	63,5	63,8	62,1	80,50	92,00	89,30	98,50	114,00	147,60	159,50
Total	3.683,00	4.253	4.833,20	5.506,70	6.141,00	6.823,60	7.601,10	8.613,90	9.880,60	11.484,70	13.104,20
Otros	154,4	151,3	174,4	184,80	260,10	326,50	331,20	406,60	433,90	502,70	588,40

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.32, y elaboración propia.

Tabla 128. Gastos del Estado: clasificación funcional, 1982-1992 (miles de millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Servicios generales	267,1	310,1	332,6	428,6	446,5	494	571	636,3	719,6	782,2	826,4
Defensa	392,2	462,5	510,3	571,9	602,4	727	698,1	750,7	734,5	1.034,50	682,1
Educación	435,7	410,9	404,5	489,4	522	594,4	690	666,5	777,9	822,6	931,4
Sanidad	341,3	449	563,4	696,1	831	955	1.055,80	1.234,10	1.449,10	1.652,50	2.183,20
Pensiones, Seguridad Social y Beneficencia	846,2	729,9	840,9	888,7	1.088,00	1.273,10	1.324,80	1.536,10	1.568,00	1.716,50	2.211,10
Vivienda	74,2	57,1	54	76,9	68,4	79,4	80	96,8	95,8	80,00	74,4
Otros servicios comunitarios	71,2	66,2	77,5	63,9	70,9	82,3	86,6	118,2	112,5	118,10	91,2
Servicios económicos	860,3	1.031,50	1.817,00	1.402,00	1.398,80	1.512,10	1.928,00	2.268,30	2.260,60	2.253,30	2.146,00
No clasificados	525,5	926,8	1.374,90	1.958,90	3.165,60	3.558,50	3.523,20	5.904,80	6.000,80	7.087,00	8.972,80
Gastos totales del Estado	3.814,80	4.444,00	5.975,10	6.576,40	8.193,40	9.275,80	9.957,50	13.211,80	13.718,80	15.546,70	18.118,60

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.18, y elaboración propia.

Tabla 129. Evolución del porcentaje sobre el PIB del Gasto Social en cada una de las partidas, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1. Enfermedad	4,8	4,66	4,6	4,61	4,54	4,6	4,75	4,92	5,13	5,42	5,59
2. Invalidez-Incapacidad	1,5	1,53	1,6	1,61	1,59	1,59	1,63	1,68	1,66	1,8	1,84
3. Acc. trab. - Enfermedad profesional	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4	0,5	0,42	0,43	0,46	0,48	0,51
4. Vejez	5,95	6,19	6,39	6,54	6,47	6,38	6,32	6,34	6,45	6,51	6,71
5. Supervivencia	1,9	1,92	1,92	1,93	1,89	1,85	1,85	1,92	1,98	2,05	2,26
6. Maternidad	0,24	0,24	0,23	0,22	0,21	0,2	0,2	0,2	0,19	0,2	0,2
7. Familia	0,42	0,37	0,33	0,29	0,24	0,2	0,19	0,18	0,16	0,15	0,2
8. Promoción de empleo	0,18	0,26	0,09	0,13	0,16	0,17	0,19	0,2	0,2	0,21	0,21
9. Desempleo	2,93	2,98	3,23	3,55	3,23	3,12	3,03	3,02	3,19	3,65	3,87
10. Vivienda	0	0,01	0,01	0,02	0,03	0,07	0,12	0,14	0,14	0,15	0,16
11. Diversos	0,31	0,28	0,25	0,22	0,25	0,25	0,22	0,22	0,23	0,27	0,27
12. Gastos administración	0,78	0,67	0,68	0,67	0,8	0,9	0,82	0,91	0,87	0,87	0,86
Total Gasto Social	19,46	19,54	19,76	20,21	19,8	19,75	19,72	20,15	20,66	21,79	22,68

Fuente: INE, CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, y elaboración propia

Tabla 130. Índices de Cobertura del Gasto en Protección Social respecto al Promedio de la UE, 1982-1992

	Enf.	Inv.	Acc.	Vej.	Sup.	Mat.	Fam.	Emp.	Des.	Viv.	Variación	Total
1982	61.1	52.0	66.0	54.1	70.2	63.3	14.6	44.1	106.9	0.0	42.3	56.2
1983	59.2	50.2	64.2	54.0	68.5	63.1	12.8	60.2	101.1	1.0	41.4	55.1
1984	58.1	53.6	64.5	56.4	70.4	63.2	12.0	25.8	112.1	2.8	36.3	56.4
1985	57.8	54.3	63.1	57.1	72.1	60.3	10.6	38.4	135.4	3.0	33.8	58.2
1986	57.4	54.9	62.6	56.9	72.4	59.3	9.1	41.5	136.7	4.8	41.3	58.0
1987	61.6	57.1	67.4	57.9	72.8	62.6	8.2	51.3	143.7	12.4	42.7	60.3
1988	66.9	60.1	72.4	58.9	77.0	60.7	7.7	51.0	156.0	21.3	38.1	62.9
1989	72.6	61.1	80.6	60.8	83.2	63.6	7.5	43.9	167.1	25.8	36.8	65.9
1990	77.6	60.9	90.8	62.9	89.8	60.4	7.0	38.7	181.5	22.3	35.8	69.0
1991	79.9	62.6	91.7	63.3	91.2	59.6	6.8	31.8	192.9	21.2	36.9	71.1
1992	78.6	65.0	92.0	62.3	93.7	58.9	8.6	23.6	194.5	15.1	39.0	71.2

Fuente: BOSCA, José Emilio [et al.], “El Gasto en Protección Social en España: Un análisis comparado con la Unión Europea”, y elaboración propia.

Tabla 131. Cuentas de la Seguridad Social: rúbricas más significativas, 1982-1992 (miles de millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Sueldos y salarios	429,5	500,7	560,6	627,2	707,2	810,5	954,50	1.127,80	1.313,10	1.523,90	1.831,20
Prestaciones sociales	2.341,00	3.740,80	3.118,70	3.581,10	4.016,90	4.446,90	4.985,00	5.632,10	6.492,60	7.526,60	8.524,70
Contribuciones a la Seguridad Social	2.365,00	2.769,30	2.989,40	3.310,00	3.755,40	4.220,80	4.629,40	5.449,20	6.213,00	6.964,40	7.966,50
Rentas corrientes	3.241,80	3.610,40	4.034,20	4.530,10	5.339,20	5.951,46	6.598,40	7.720,00	8.673,00	9.831,50	11.228,00
Necesidad de financiación	153,30	22,60	-1,60	-74,90	-24,10	107,00	-4,50	200,60	65,00	-173,80	-77,90
Adquisición de obligaciones de empresas	191,70	53,40	33,50	-24,10	-85,20	-211,00	20,40	-70,60	-205,10	-630,40	-548,00

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.31, y elaboración propia.

Tabla 132. Ingresos corrientes de Protección Social por naturaleza y sector de procedencia, 1982-1992. Cuentas Integradas en términos SEEPROS (miles de millones de pesetas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Cotizaciones sociales totales	2.950	3.411	3.680	4.053	4.622	5.210	5.705	6.442	7.490	8.213	9.461
Cotizaciones de los empleadores	2.257	2.600	2.731	3.024	3.451	3.895	4.286	4.841	5.674	6.214	7.196
Cotizaciones de los asalariados	376	450	503	531	610	694	757	876	1.011	1.018	1.137
Otras cotizaciones	317	361	446	498	561	621	662	725	805	981	1.128
Aportaciones públicas	1.059	1.022	1.287	1.418	1.682	1.867	2.171	2.541	2.775	3.095	3.790
Otros ingresos	70	79	121	136	161	206	223	234	260	280	307
Ingresos totales	4.079	4.512	5.088	5.606	6.465	7.283	8.099	9.217	10.526	11.588	13.558

Fuente: COMÍN, Francisco y DÍAZ, Daniel, “Sector público administrativo y estado del bienestar” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 12.33, y elaboración propia.

Tabla 133. Beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad Social. Evolución del número de pensionistas de la Seguridad Social, por clases, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Jubilación	2.307.016	2.362.191	2.422.918	2.470.122	2.535.626	2.618.895	2.701.239	2.772.149	2.844.583	2.926.309	3.009.050
Invalidez	1.215.367	1.331.710	1.419.934	1.459.383	1.490.439	1.390.433	1.450.735	1.513.365	1.570.974	1.626.859	1.678.159
Viudedad	1.145.028	1.190.973	1.236.686	1.288.430	1.338.290	1.516.942	1.542.341	1.558.368	1.581.441	1.602.543	1.628.659
Orfandad	149.104	151.541	153.949	155.622	157.598	158.800	161.334	162.682	163.653	165.032	166.388
A favor de familiares	20.971	21.701	22.423	22.880	23.466	23.779	24.830	25.703	26.484	27.230	27.509
Total	4.837.643	5.058.211	5.255.999	5.255.999	5.545.492	5.708.849	5.880.479	6.032.267	6.187.135	6.347.973	6.509.765

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.15, y elaboración propia.

Tabla 134. Evolución de las prestaciones por incapacidad temporal, 1982-1992 (euros corrientes)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Transferencias corrientes	10.794	12.721	14.082	15.715	17.651	19.375	25.374	29.115	33.703	38.164	44.287	48.777	52.806	56.699	61.641
Pensiones contributivas	7.920	9.562	11.237	12.739	14.471	15.909	17.737	20.007	22.722	25.383	28.375	31.544	31.184	37.205	40.367
Pensiones no contributivas										38	345	604	866	967	1.122
Incapacidad temporal	1.171	1.270	1.285	1.354	1.448	1.541	1.748	2.074	2.487	3.017	3.397	3.349	3.375	3.376	3.514
Prestación por maternidad							14	23	34	45	53	54	53	331	482
Total agregado. Neto SS	14.928	17.840	19.153	21.522	24.298	26.895	30.466	35.254	40.753	45.418	53.006	57.791	61.750	65.916	72.778

Fuente: ROMAY LÓPEZ, Rosa y SANTÍN GONZÁLEZ, Daniel, *Nuevas herramientas para gestionar el gasto por incapacidad temporal*, y elaboración propia.

Tabla 135. Cuadro comparativo del poder adquisitivo de la pensión media en relación al PIB por habitante, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1. Pensión media	19.857	23.010	25.840	28.539	31.515	33.962	36.553	40.019	44.464	48.515	52.555
2. PIB por habitante	520.962	589.003	662.261	732.399	835.932	933.546	1.035.923	1.159.614	1.287.771	1.406.125	1.504.543
% (1)/(3)	53,3	54,6	54,6	54,5	52,7	50,9	49,3	48,3	48,3	48,3	48,9

Fuente: INE, y elaboración propia.

Tabla 136. Evolución del empleo total, los trabajadores en alta de la Seguridad Social y el total del empleo asalariado, 1975-1996 (miles de personas)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Empleo total	12.789	12,653	12.551	12.215	11.953	11.683	11.377	11.272	11.219	10.591	11.142
Trabajadores en alta					10.286	10.414	10.344	10.271	10.342	10.268	10.613
Empleo asalariado	8.962	8.867	8.844	8.614	8.384	8.267	8.027	7.983	7.927	7.689	7.745
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Empleo total	11.298	11.808	12.205	12.624	13.078	13.203	12.998	12.616	12.553	13.025	13.183
Trabajadores en alta	10.908	11.292	11.767	12.304	12.514	12.648	12.535	12.099	12.045	12.308	12.506
Empleo asalariado	7.998	8.380	8.730	9.212	9.650	9.844	9.633	9.367	9.332	10.564	10.686

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.14 y elaboración propia.

Tabla 137. Evolución del paro registrado, 1976-1996. Media mensual

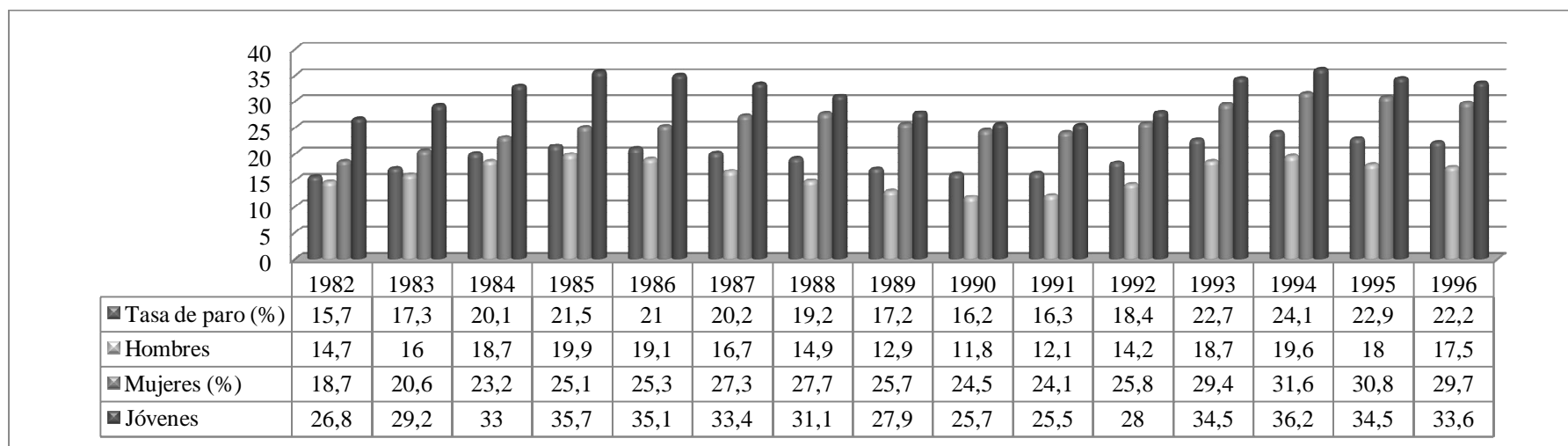
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
En miles	376,4	539,6	818,5	1.037,20	1.277,30	1.566,20	1.872,60	2.198,60	2.475,40	2.642,00
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
En miles	2.924,10	2.858,30	2.550,30	2.350,00	2.289,00	2.259,90	2.647,00	2.647,00	2.449,00	2.257,40

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.16 y elaboración propia.

Tabla 138. Principales características de la evolución del desempleo, total, por sectores, y referente a los trabajadores sin empleo previo, 1981-1986

	1981	1985	1990	1996
Total	1.566.208	2.641.998	2.350.018	2.275.402
Industria, Construcción, Servicios	1.156.458	2.139.900	1.695.100	1.796.989
Sector primario	83.030	71.800	90.200	59.200
Sin empleo anterior	326.720	435.300	564.700	419.200

Fuente: INEM, Secretaría de Empleo y Gabinete Técnico Confederal de CC.OO., “El sistema de protección al desempleo”, y elaboración propia

Gráfico 27. Evolución de la tasa de paro total, junto con la de hombres, mujeres y jóvenes, 1982-1996 (%)

Fuente: EPA, y elaboración propia.

Tabla 139. Evolución de la tasa de participación en el mercado de trabajo, 1982-1992. Total, por hombres, mujeres y jóvenes (%)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Tasa de participación 16-64 (%)	57	57	56,9	56,8	57	58,6	60,3	60,3	60,9	61	61
Hombres (%)	81,3	80,7	80	79,5	79,5	79,1	79,8	79,4	79,6	79,2	78,2
Mujeres (%)	33,1	33,9	34	34,2	34,9	38,4	40,9	41,3	42,2	42,9	43,8
Jóvenes (%)	64,7	65,5	66,3	66,4	67,7	70,6	72,3	72,1	72,5	72,1	70,9

Fuente: INE, y elaboración propia.

Tabla 140. Cobertura del desempleo, 1982-1996

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Perceptores de prestaciones	776.823	845.625	902.667	1.087.571	1.122.923	1.112.987	1.116.402	1.172.890	1.306.853	1.427.990	1.632.990
Desempleo total	523.962	456.454	501.033	537.521	504.296	425.395	410.295	419.864	498.590	613.418	728.342
Desempleo parcial	44.844	52.972	56.901	48.012	22.742	14.023	11.790	7.050	5.047	3.011	2.538
Trabajadores eventuales agrarios		192.301	184.408	184.408	232.067	251.943	282.357	296.580	294.676	236.327	201.372
Subsidio asistencia	208.316	326.199	453.675	561.236	656.286	680.891	668.244	665.751	704.269	776.292	817.039

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.17 y elaboración propia.

Tabla 141. Evolución de los beneficiarios de la prestación por desempleo, 1985-1996 (miles de personas)

	1985	1990	1995	1996
(a) Contributivas	537,2	498,6	622,4	590,3
Evolución anual (%)	7,2	18,8	-14,9	-5,2
(b) Asistencial	317,9	508,5	613,8	556,5
Evolución anual (%)	108,5	13,3	-22,3	-9,3
Total protegido (a+b)	855,1	1.007,10	1.236,20	1.146,80
Evolución anual (%)	30,9	15,9	-18,8	-7,2
(c) Subsidio REAS	184,3	294,7	216,1	192,3
Evolución anual (%)	-4,1	-0,6	-4,9	-11
Total protegido (a+b+c)	1.039,40	1.301,80	1.452,30	1.339,10
Evolución anual (%)	22,9	11,7	-17	-7,8
Nº parados	2.642,00	2.350,00	2.449,00	2.275,40
Evolución anual (%)	6,7	-7,9	-7,5	-7,1
Parados sin protección	1.629,80	1.602,60	1.048,20	996,70
Evolución anual (%)	-1,7	-24,3	11	-6,1

Fuente: INEM, Secretaría de Empleo y Gabinete Técnico Confederal de CC.OO., “El sistema de protección al desempleo”, y elaboración propia.

Tabla 142. Evolución de los gastos por desempleo y cobertura (%) (Índice gasto promedio real 1982=100)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Gastos INEM/PIB	2,37	2,5	2,44	2,78	2,7	2,71	2,7	2,68	2,94	3,24	3,64
Gastos desempleo/PIB	2,26	2,26	2,44	2,65	2,47	2,4	2,55	2,56	2,7	2,97	3,42
Índice gasto promedio real	100	107,9	82,9	77,2	73,6	76,5	85,6	85,9	84,8	88,2	90

Fuente: Banco de España, INE y elaboración propia.

Tabla 143. Apartados principales de la financiación del sistema de protección al desempleo (miles de millones de pesetas corrientes)

	1982	1985	1990	1993	1995
Total prestaciones desempleo	440,3	697,9	1.104,20	2.825,00	1.732,90
(1) Total cuotas desempleo	235,9	403,3	801,3	1.182,40	1.253,00
(2) Prestación contributiva		564,8	885,7	1.450,00	1.122,00
Saldo contributivo (+1-2)		-161,5	-84,4	-267,60	131,00
(3) Prestación asistencial		136,3	297,7	565,30	436,50
(4) Subsidio agrario		42,8	95,3	100,70	121,70
Aportación Estado + 1(-2-3-4)		-340,6	-477,4	-933,60	-427,30

Fuente: INEM, Secretaría de Empleo y Gabinete Técnico Confederal de CC.OO., “El sistema de protección al desempleo”, y elaboración propia.

Tabla 144. Principales partidas del gasto presupuestado por el INEM, 1982-1996 (miles de millones de pesetas corrientes)

	1982	1986	1991	1996
Prestaciones por desempleo	440,3	770,4	1.196,10	1.577,10
Fomento del Empleo	44,3	50,9	161,1	132,3
Formación Ocupacional	6,2	37,6	121,2	132,3
Escuelas Taller				42,3
Otros		5,2	8,8	8,9
Total	490,8	864,1	1.487,20	1.916,00

Fuente: INEM, Secretaría de Empleo y Gabinete Técnico Confederal de CC.OO., “El sistema de protección al desempleo”, y elaboración propia.

Tabla 145. Evolución de la jornada efectiva semanal, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Sectores no agrícolas											
B	40	39,1	38,6	39,9							
C	39,1	38,4	37,6	37,2	37,4	36,1	36,5	36,8	36,7	36,6	36,1
Industrias manufactureras											
B	39,2	38,4	37,6	38,6							
C	38	37,4	36,5	36,3	36,7	35,4	35,8	36,8	36,8	36,7	36,6
Construcción											
B	39,7	38,6	38	38,9							
C	39,1	38,2	37,3	37,2	37,5	36,6	36,8	37,8	37,4	37,5	37,1
Minas y canteras											
B	37,8	36,7	35,8	37							
C	36,6	36,6	34,7	35	35,1	32,3	33,9	34,1	34,1	34,7	33,4
Transporte, almacenaje y comunicación											
B	42,1	40,8	39,8	40							
C	41,5	40,5	39,6	38,6	38,7	37,9	38,4	38,3	38,3	38,2	38,6

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.32 y elaboración propia.

Nota: B: Fuerza civil ocupada. Cuarto trimestre del año / C: Personas ocupadas incluidas las Fuerzas Armadas. En ambos casos se refiere a personas de más de 16 años.

Tabla 146. Jornada efectiva semanal por sexo, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Sectores no agrícolas											
Hombres											
B	41,1	40,2	39,5	40							
C	40,1	39,4	38,6	38,2	38,3	37,1	37,6	37,9	38	37,8	37,5
Mujeres											
B	37,5	36,8	36,3	36,8							
C	36,7	36	35,4	35	35,3	33,9	33,9	34,3	34,1	34	33,4
Industrias manufactureras											
Hombres											
B	39,8	38,9	38,1	39,1							
C	38,5	38,1	36,9	36,8	37	35,8	36,3	37,3	37,2	37,1	36,8
Mujeres											
B	37,2	36,4	35,8	36,4							
C	36	35,4	35	34,5	35,4	33,9	34,3	35	34,9	35	34,5

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.34 y elaboración propia.

Nota: B: Fuerza civil ocupada. Cuarto trimestre del año / C: Personas ocupadas incluidas las Fuerzas Armadas. En ambos casos se refiere a personas de más de 16 años.

Tablas 147. Horas efectivas y habitualmente trabajadas por semana a partir de lo ocupados y asalariados agrarios, no agrarios, privados y públicos, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Total ocupados	42,7	42	41,2	40,5	40,4	39,9	39,5	39,6	39,6	39,4	39,2
Ocupados agrarios	47	46,3	45,4	44,9	44,6	44,3	43,9	43,6	44,5	44,5	45,2
Ocupados no agrarios	41,8	41	40,2	39,5	39,6	39,1	38,8	39	38,9	38,8	38,5
Ocupados asalariados	41,1	40,4	39,5	38,9	38,8	38,4	38	38,1	38,1	37,9	37,8
Asalariados privados	41,5	40,8	39,7	39	39	38,6	38,2	38,4	38,4	38,2	38,1
Asalariados públicos	39,9	39	39,4	38,2	37,6	37,1	37,1	37	36,8	36,6	36,5
Jornada habitual						41,6	41,4	41,2	41,2	41,1	40,9

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.35 y elaboración propia.

Tabla 148. Evolución de las horas semanales de trabajo de los trabajadores a tiempo completo en la industria, 1966-1996

	1966	1976	1987	1990	1993	1996
UE-15			40,8	40,7	40,5	40,6
Alemania	43,7	41,4	40	39,2	38,8	39,3
Francia	45,9	41,6	39,9	40	40,2	40
Italia			40,4	40,4	40,4	40,5
Gran Bretaña	45	43,5	43,5	44,3	43,8	44,5
España	44,4	41,6	40,5	40,5	40,5	40,7
Holanda	46,1	41,3	38,8	38,6	39,2	39,3
Suecia			40,5	40,7	41,4	41,6
EE.UU.	41,4	40,1	41	40,8	41,4	41,6
Japón			46,3	45,7	43	43,5

Fuente: MARIMON, Ramón y ZILIBOTTI, Fabrizio, “Employment and Distributional Effects of Restricting Working” y elaboración propia.

Tabla 149. Normas sobre el tiempo de trabajo en la UE a raíz de la Directiva 93/104/CE

	Directiva UE (1993)	Bélgica	Dinamarca	Francia	Alemania	Grecia	Irlanda	Italia	Holanda	Portugal	España	Reino Unido
Descanso min. diario (h)	11	15	11	14	14	5	13	16	14,5	15	15	
Descanso mín. semanal (h)	24	24	35	24	24		24	24	24	24	36	
Semana laboral máxima (media mens.) (h)	48	45	45	48	48	48	48	48	45	48	49,5	
Semana la. media (h)		38,1	39,1	39,9	40,3	40	40,5	39,5	39,1	42	40,7	43,6
Empleados con sem. lab. normal de 45 horas (%)		3	6	8	7	12	11	8	3	9	8	30
Vacaciones pagadas mínimo. N° semanas												
Legisladas	4	4	5	5	3	4	3	4	4	4,4	5	
Acuerdos colectivos	11	5		5,1	5,4	4,4	4		4,7	4,4	5	

Fuente: MARIMON, Ramón y ZILIBOTTI, Fabrizio, “Employment and Distributional Effects of Restricting Working” y elaboración propia.

Tabla 150. Accidentes de trabajo en España, 1982-1992. Total y por mortales

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Total
Total	682.367	654.254	602.101	610.448	634.282	710.256	1.036.564	1.177.531	1.245.861	1.217.310	1.157.113	9.728.087
Mortales	1.507	1.368	1.416	1.510	1.530	1.645	1.808	1.981	1.974	1.946	1.704	18.389

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.36 y elaboración propia.

Tabla 151. Accidentes de trabajo por sexo, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Hombres	444.534	408.707	410.826	411.044	431.376	483.630	526.114	584.549	622.961	607.736	549.164
Mujeres	38.037	35.990	35.239	36.716	40.073	48.316	52.918	61.633	73.742	80.799	79.476
Total	482.571	444.697	446.065	447.760	471.449	530.946	579.032	646.182	696.703	688.535	628.640

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.37 y elaboración propia.

Tabla 152. Accidentes mortales de trabajo en España, por año, mes, y día, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Año	1.507	1.368	1.416	1.510	1.530	1.645	1.808	1.981	1.974	1.946	1.704
Mes	50,23	45,6	47,2	50,33	51	54,83	60,26	66,03	65,8	64,86	56,8
Día	4,12	3,74	3,87	4,13	4,19	4,5	4,95	5,42	5,4	5,33	4,66

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.36 y elaboración propia.

Tabla 153. Índice de Incidencia de los accidentes por gravedad por cada mil asalariados, 1988-1995

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Acumulado
Leves	58,02	65,74	68,47	67,73	64,07	56,84	58,46	62,5	62,91
Graves	1,34	1,27	1,29	1,25	1,13	1,14	1,09	1,07	1,2
Mortales	0,12	0,14	0,14	0,14	0,12	0,11	0,11	0,1	0,12
Total	59,48	67,5	69,9	69,12	65,32	58,08	59,66	63,67	64,23

Fuente: ORTS, Enrique [et al.], “Trabajo temporal y siniestralidad laboral en España en el período 1988-1995”, y elaboración propia.

Nota: Índice de incidencia: Accidentes con baja en jornada de trabajo por 1.000/Población asalariada.

Tabla 154. Accidentes de trabajo, por el tipo de incapacidad producida, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
CON BAJA											
Accidentes en jornada de trabajo											
Leves	508.390	478.995	434.560	436.556	459.890	518.406	568.844	636.773	691.638	768.607	622.229
Graves	11.868	11.714	10.431	10.055	10.457	11.358	13.677	13.353	13.650	13.343	11.759
Mortales	1.118	957	1.074	1.149	1.102	1.182	1.322	1.450	1.425	1.360	1.225
Total	521.376	491.666	446.065	447.760	471.449	530.946	583.843	651.576	706.713	693.310	635.213
IN ITINERE											
Leves	35.660	34.331	30.074	31.390	30.519	33.837	33.535	37.673	40.108	40.002	37.680
Graves	2.531	2.521	2.238	2.232	2.208	2.547	2.680	2.853	3.017	2.909	2.501
Mortales	389	311	342	361	428	463	486	531	549	586	479
Total	38.580	37.263	32.654	33.983	33.155	36.847	36.701	41.057	45.608	46.880	39.762
Total con baja	559.956	528.929	478.719	481.743	504.604	567.793	620.544	692.633	752.321	740.190	674.975
Total sin baja	122.411	125.325	123.382	128.705	129.678	142.463	416.020	484.898	493.540	477.120	482.138
Total general	682.367	654.254	602.101	610.448	634.282	710.256	1.036.564	1.177.531	1.245.861	1.217.310	1.157.113

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.39 y elaboración propia.

Tabla 155. Mortalidad laboral, por sectores, 1982-1992

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Total por sectores
Agricultura	133	108	293	194	214	194	181	195	202	197	151	2.062
Industria	467	446	324	362	321	375	397	440	386	366	348	4.232
Construcción	171	167	194	195	214	224	302	325	341	319	268	2.720
Servicios	330	318	363	398	353	389	442	490	517	497	472	4.569
Total	1.101	1.039	1.074	1.149	1.102	1.182	1.322	1.450	1.446	1.379	1.239	13.483

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.38 y elaboración propia.

Tabla 156. Incidencia de accidentes según tipo de contrato y Riesgo Relativo (RR) por gravedad de accidente, 1988-1995

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Acumulado
Total									
IIT	117,65	127,22	125,22	118,21	105,49	91,01	93,24	99,65	108,9
IIF	41,89	45,06	45,92	45,75	45,11	42,36	42,55	44,46	44,17
RR	2,81	2,82	2,73	2,58	2,34	2,15	2,19	2,24	2,47
IC 95%									
IIT/IC	2,79	2,81	2,71	2,57	2,33	2,14	2,18	2,23	2,46
IIF/IC	2,82	2,84	2,74	2,6	2,35	2,16	2,2	2,25	2,48
Graves									
IIT	2,7	2,4	2,28	2,07	1,78	1,75	1,65	1,68	2
IIF	0,92	0,86	0,85	87	0,8	0,84	0,8	0,75	0,84
RR	2,92	2,8	2,68	2,38	2,24	2,07	2,05	2,23	2,38
IC 95%									
IIT/IC	2,81	2,7	2,58	2,3	2,15	1,99	1,95	2,15	2,35
IIF/IC	3,03	2,9	2,77	2,47	2,33	2,16	2,14	2,33	2,41
Mortales									
IIT	0,22	0,24	0,2	0,21	0,17	0,15	0,16	0,14	0,18
IIF	0,1	0,11	0,12	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	0,1
RR	2,25	2,19	1,73	1,99	1,61	1,49	1,81	1,59	1,8
IC 95%									
IIT/IC	1,99	1,96	1,55	1,78	1,43	1,32	1,59	1,4	1,73
IIF/IC	2,55	2,45	1,93	2,22	1,81	1,7	2,06	1,81	1,88

Fuente: ORTS, Enrique [et al.], “Trabajo temporal y siniestralidad laboral en España en el período 1988-1995”, y elaboración propia.

Nota: IIT: Índice de incidencia por mil asalariados temporales; IIF: Índice de incidencia por mil asalariados fijos; RR: Riesgo relativo; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%.

Tabla 157. Riesgos Relativos (RR) por género y gravedad del accidente, 1988-1995

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Acumulado
Hombres									
Total									
RR	3,12	3,12	3,02	2,92	2,6	2,36	2,38	2,41	2,73
Graves									
RR	3,25	3,16	3,03	2,78	2,57	2,36	2,3	2,47	2,7
Mortales									
RR	2,46	2,41	1,93	2,25	1,82	1,66	1,98	1,71	2
Mujeres									
Total									
RR	2,17	2,3	2,3	2,19	2,11	2,01	1,99	1,99	2,14
Graves									
RR	2,07	1,68	1,75	1,43	1,51	1,5	1,37	1,54	1,58
Mortales									
RR	3,17	2,43	1,33	2,82	1,28	1,59	1,66	1,4	1,78

Fuente: ORTS, Enrique [et al.], “Trabajo temporal y siniestralidad laboral en España en el período 1988-1995”, y elaboración propia.

Tabla 158. Riesgo Relativo (RR) específicos por grupo de edad y género para el total de accidentes

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Acumulado
Total									
16-19	3,67	3,23	2,66	2,5	2,26	2,34	2,21	2,18	2,75
20-24	3,1	3,17	2,96	2,82	2,17	2,02	2,21	1,99	2,58
25-54	2,99	2,94	2,87	2,79	2,43	2,22	2,21	2,3	2,55
>54	2,76	2,95	2,7	2,65	2,36	2,15	2,35	2,33	2,53
Hombres									
16-19	3,57	3,34	2,6	2,53	2,22	2,27	1,88	1,6	2,64
20-24	2,93	3,07	2,85	2,87	2,18	2,02	2,19	1,95	2,55
25-54	3,27	3,18	3,14	3,11	2,67	2,39	2,37	2,46	2,78
>54	3,05	3,17	2,86	2,95	2,64	2,39	2,5	2,46	2,76
Mujeres									
16-19	3,21	2,6	2,3	2,18	2,09	2,2	2,06	2,67	2,56
20-24	2,75	2,81	2,74	2,38	1,93	1,83	1,83	1,67	2,33
25-54	2,1	2,23	2,29	2,3	2,16	2,07	1,96	1,98	2,16
>54	1,85	2,12	2,01	1,81	1,6	1,6	1,77	1,74	1,83

Fuente: ORTS, Enrique [et al.], “Trabajo temporal y siniestralidad laboral en España en el período 1988-1995”, y elaboración propia.

Tabla 159. Selección de los ingresos y gastos del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 1990-1992

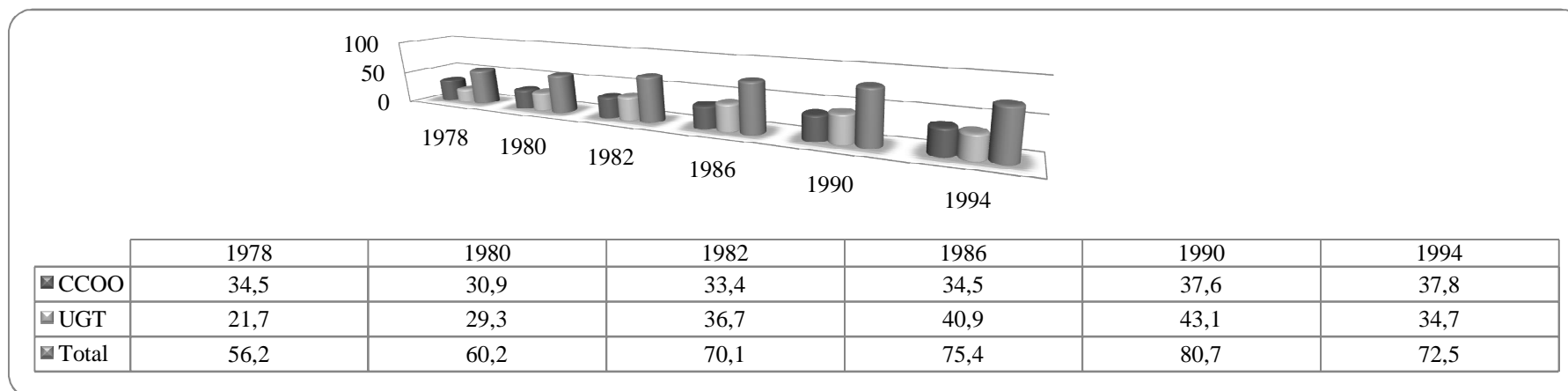
	1990	1991	1992
Ingresos	417.235	451.534	478.867
Gastos	338.196	178.083	410.289
Excedente	79.039	73.451	68.578

Fuente: CASTEJÓN, Emili y Crespán, Xavier, “Accidentes de trabajo: [casi] todos los porqués”, y elaboración propia.

Tabla 161. Resultados de las elecciones sindicales, 1978-1994

	CCOO	UGT	USO	ELA/STV	CIG	CSI/CSIFC	Otros sindicatos	No afiliados	Delegados elegidos
1978	34,5	21,7	3,9	0,9			20,8	18,2	191.041
1980	30,9	29,3	8,7	2,4	1,0		13,1	14,6	164.417
1982	33,4	36,7	4,6	3,3		1,2	8,7	12,1	140.770
1986	34,5	40,9	3,8	3,3	1,3		9,5	6,7	147.930
1990	37,6	43,1	3,0	3,2	1,5	1,4	6,4	3,6	204.581
1994	37,8	34,7		3,6	1,7			22,1	203.804

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.1 y elaboración propia

Gráfico 32. Evolución comparada y total de los resultados electores obtenidos por CCOO y UGT

Fuente: MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.1 y elaboración propia.

Tabla 162. Evolución del número de huelgas y de cierres patronales en los países de la UE-15 y otros países occidentales, 1976-1996

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Austria				8	9	6	2	4	2	4	11	6	5	7	9	9	3	3	0	1	0
Bélgica	281	220	195	215	132					65			64	81	33	62	49	28	30	46	60
Dinamarca	204	228	314	218	225	94	180	161	157	820	215	202	157	132	232	203	151	218	240	424	930
España	3662	1194	1128	2680	2103	1993	1810	1451	1498	1092	914	1497	1193	1047	1312	1645	1360	1209	908	883	830
Finlandia	3199	1633	1207	1715	2182	1591	1212	1919	1679	833	2251	802	1353	629	455	284	168	126	171	112	94
Francia	4348	3281	3195	3121	2118	2405	3113	2837	2537	1901	1391	1391	1852	2040	1790	1572	1494	1472	1671	2066	1439
Grecia	947	569	616	588	726	466	968	675	486	453	213	381	320	207	234	161	824	596	215	110	171
Irlanda	134	175	152	140	130	117	131	154	192	116	102	80	65	38	49	54	38	46	28	34	32
Italia	2706	3308	2479	2000	2238	2204	1747	1565	1816	1341	1469	1149	1769	1297	1094	791	903	1054	861	545	904
Luxemburgo							0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0			
Países Bajos	11	44	32	57	22	11	12	9	16	45	35	28	38	27	29	28	23	12	17	14	12
Portugal		332	333	370	269	602	528	500	525	476	363	213	181	307	271	262	409	230	300	282	274
Reino Unido	2016	2703	2471	2080	1330	1338	1528	1352	1206	903	1074	1016	781	701	630	369	253	211	205	235	244
Suecia	73	35	99	207	212	68	46	92	206	160	75	72	144	139	126	23	20	33	13	36	9
Estados Unidos	231	298	219	235	187	145	96	81	62	54	69	46	40	51	44	40	35	35	45	31	37
Canadá	1039	803	1058	1050	1028	1048	677	645	716	829	748	668	548	627	579	463	404	381	379	328	330
Australia	2055	2090	2277	2042	2429	2915	2060	1787	1965	1895	1754	1517	1508	1402	1193	10362	728	610	560	643	543
México	547	476	758	795	1339	1066	1925	216	427	159	312	174	132	118	150	136	156	155	116	96	51
Japón	2720	1712	1517	1153	1133	955	944	893	596	627	620	474	498	362	284	310	263	252	230	209	193

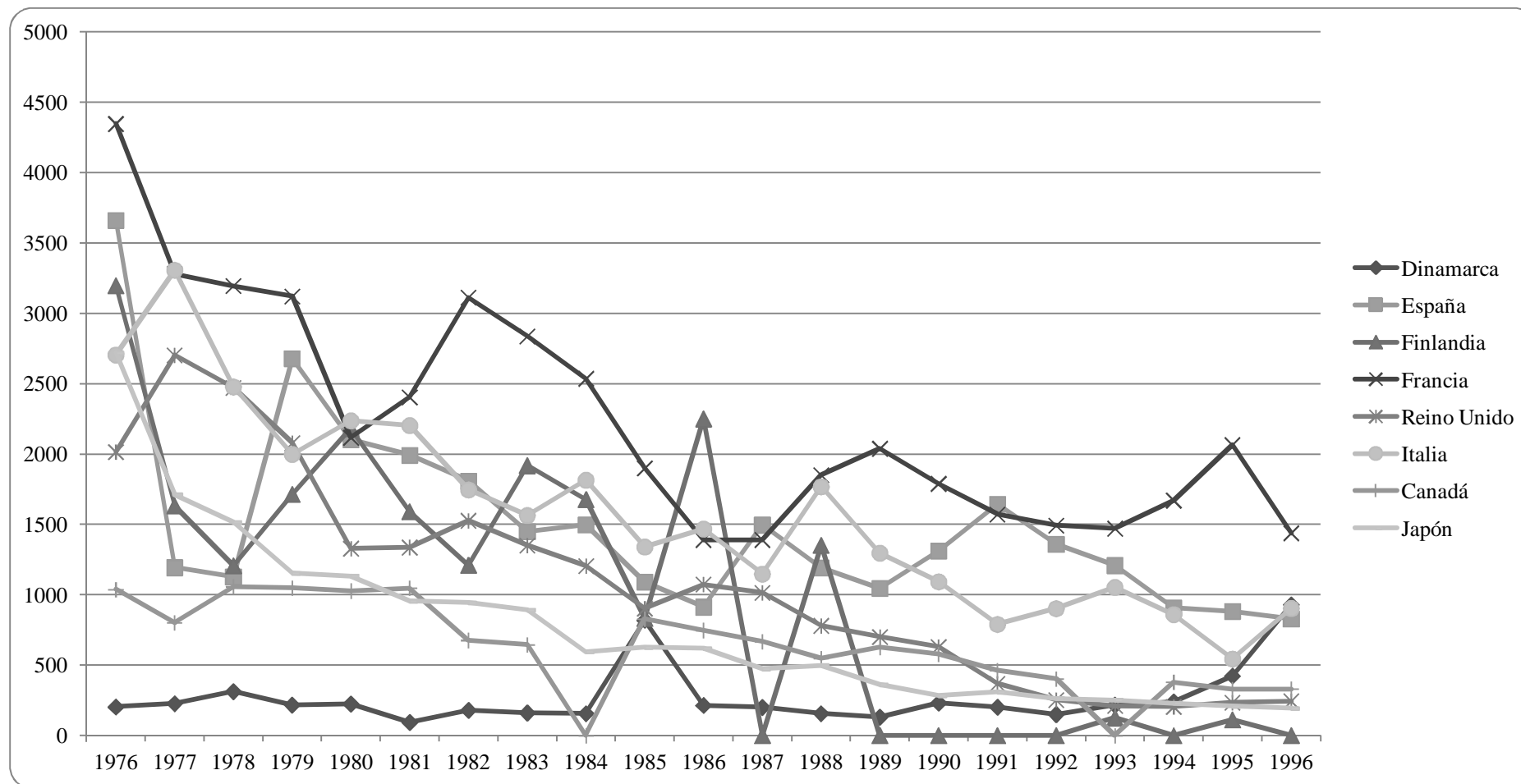
Fuente: Laborsta-OIT, Labour Disputes-Eurostat, y elaboración propia.

Nota: No hay datos disponibles tanto para la República Federal de Alemania como la Alemania reunificada

En los datos en relación a Francia, están tan sólo los correspondientes a los sectores de la agricultura y la administración pública.

Fuentes de información por cada país: a) Registro de organizaciones de empleadores/trabajadores: Austria, Dinamarca, Finlandia; b) Registro de relaciones laborales: España, Francia, Portugal, Canadá, México, Japón; c) Recolección especial de datos: Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Australia, d) Fuente ignorada: Luxemburgo.

Gráfico 33. Evolución comparada del descenso de la conflictividad, medida en número de huelgas, en un conjunto de países sometidos a políticas de carácter netamente liberal entre 1976-1996



Fuente: Laborsta-OIT, Labour Disputes-Eurostat, y elaboración propia.

Tabla 163. Evolución del número de trabajadores implicados en huelgas laborales en los países de la UE-15 y otros países occidentales, 1976-1996

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Alemania	169312	34437	487050	77326	45159	253334	39981	94070	537265	78187	115522
Austria	2352	43	699	786	24181	17115	91	208	268	35531	3222
Bélgica	117800	74217	101703	61844	30432					37500	
Dinamarca	87224	36305	59340	156589	62063	53463	53185	40919	50764	581297	56735
España	2556800	2955000	3863900	5713200	2287000	1944900	1058900	1483600	2242200	1511200	857900
Finlandia	496830	738630	161290	225170	407260	488860	165820	419870	558700	170020	602730
Francia	2022500	1919900	704800	967200	500800	329000	397700	37800	42100	22800	21800
Grecia	300759	559858	471305	1262433	1407821	401757	352737	224315	159126	785725	1106330
Irlanda	42281	33805	32558	49621	30879	31958	29952	30482	30992	168675	50227
Italia	11897819	13802955	8774193	16237444	13824641	8226626	10483018	6844170	7356525	4842821	3606692
Luxemburgo							0	0	0	0	0
Países Bajos	15255	44120	9894	37341	25647	8600	69766	20307	16158	22570	17029
Portugal		307957		266513	289600	403900	262500	273600	230500	199000	231500
Reino Unido	668000	1165800	1041500	4607800	833700	1512500	2102900	573800	1464300	791300	720200
Suecia	8715	13101	8319	32315	746677	99211	5136	14372	23676	124512	66304
Estados Unidos	1518500	1211900	1006300	1020900	795300	728900	655800	909400	376000	323900	533200
Canadá	1570921	217557	401688	462504	441025	338548	444302	329309	186916	162333	484255
Australia	2190100	596200	1075600	1862900	1172600	1247200	706100	470200	560300	570500	691700
México	23684	13411	14976	17264	42774	31512	25173	45949	65359	57354	82700
Japón	1356025	691908	659966	449504	562921	247114	215701	224129	155058	123393	118032

Tabla 163. Evolución en número de trabajadores en huelgas laborales implicados en los países de la UE-15 y otros países occidentales, 1976-1996 (continuación)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Alemania	154966	33485	43934	257160	208177	598364	132555	400676	183346	165721
Austria	7203	0	3715	5274	92707	18039	6869	0	60	0
Bélgica		23200	19500	9800	11200	21900	8500	5900	12800	19971
Dinamarca	56878	29591	27212	37386	37861	32938	58764	36788	124496	65735
España	1881200	6692200	1382100	977000	1983800	5192100	1076800	5437400	573500	1087800
Finlandia	99289	244072	158476	244759	166772	103505	23193	70535	127039	43113
Francia	18600	27200	20300	18500	18800	16300	19900	18000	43477	11364
Grecia	1270602	449441	795744	1303973	476082	243173	181737	73859	52246	76060
Irlanda	26221	10218	3692	10309	17975	13107	12764	5007	31653	13339
Italia	4272733	2712084	4451833	1633996	2952242	3178000	4384000	2614000	445000	1689100
Luxemburgo	60	0	0	700	0	0	0			
Países Bajos	12562	5234	15356	24978	42050	52419	20662	21809	55000	8100
Portugal	81300	155500	296100	128900	119000	131900	83100	94400	60500	50500
Reino Unido	887400	790300	727000	298200	176000	148000	385000	107000	174000	364300
Suecia	10517	95150	34102	73159	2508	17987	29318	21996	125489	9137
Estados Unidos	174300	118300	452100	184900	392000	363800	181900	322000	191500	272700
Canadá	582042	206796	444747	270471	253334	149475	101804	81245		
Australia	608800	894400	709800	729900	1181600	871500	489600	265100	344300	577700
México	201700	117800	57866	49315	64855	91424	31708	27134	12249	10525
Japón	101132	74856	85786	84303	52762	109296	64007	49009	37542	23196

Fuente: Laborsta-OIT, Labour Disputes-Eurostat, y elaboración propia.

Nota: Datos relacionados con Alemania a anteriores al 3 de noviembre de 1990 tan sólo corresponden a la República Federal Alemana.

Datos correspondientes a Francia se tiene en cuenta todos los trabajadores implicados en huelgas en curso del año

Datos correspondientes a Canadá se excluyen las interrupciones de trabajo de menos de 10 días de trabajo no trabajado.

Fuentes de información por cada país: a) Registro de organizaciones de empleadores/trabajadores: Austria, Dinamarca, Finlandia; b) Registro de relaciones laborales: España, Francia, Portugal, Canadá, México, Japón, Alemania; c) Recolección especial de datos: Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Australia, d) Fuente ignorada: Luxemburgo.

Tabla 164. Evolución de la conflictividad laboral medida en días no trabajados en los países de la UE-15 y en otros países occidentales, 1976-1996

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Alemania	533696	23681	4281284	483083	128386	58398	15106	40842	5617595	34505	27964
Austria	589	11	10222	764	16960	4024	344	514	543	22752	3253
Bélgica	896805	664236	1002489	615484	216754					129800	
Dinamarca	210300	229700	128800	173000	186700	651600	92700	78800	131700	2332700	93200
España	12593100	16641700	11550900	18917000	6177500	5153500	2787600	4416700	6357800	3223500	2279400
Finlandia	1237830	2374700	132400	243400	1605600	659100	207600	719700	1526900	174270	2787550
Francia	4054903	2434300	2081000	3172300	1522900	1441600	2250200	1321000	1316800	726700	567600
Grecia	787852	1252445	987478	1678805	2907431	812998	1431439	554547	562432	1094411	1262766
Irlanda	776949	442145	613016	1464952	412118	433979	434253	319015	386421	417726	309178
Italia	25377571	16566143	10177033	27530428	16457286	10527286	18562857	14003000	8703286	3830820	5643710
Luxemburgo							0	0	0	0	0
Países Bajos	13984	246818	5832	308872	56832	24114	215441	118162	29181	89390	38858
Portugal		309456		493003	533400		456100	650700	269700	275400	381900
Reino Unido	3284000	10142000	9405000	29474000	11964000	4266000	5313000	3754000	27135000	6402000	1920000
Suecia	24744	87151	37135	28664	4478511	209137	1761	36923	31293	504214	682652
Estados Unidos	23961900	21258000	23774200	20409200	20843900	16908400	9061200	17460700	8498800	7079100	11861000
Canadá	11609890	3307880	7392820	7834230	8975390	8878490	5795420	4443960	3883400	3125560	7151470
Australia	3799400	1654800	2130800	3964400	3319700	4189300	1980400	1641400	1307400	1256200	1390700
México							1363200	775100	238000	333600	1836800
Japón	3253715	1518476	1357502	930304	1001224	553726	538143	506873	354050	264054	253418

Tabla 164. Evolución de la conflictividad laboral medida en días no trabajados en los países de la UE-15 y en otros países occidentales, 1976-1996 (continuación)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Alemania	33325	41880	100409	363547	153589	1545320	592995	229436	247460	98135
Austria	4822	8542	2986	8870	58341	23437	13008	0	120	0
Bélgica		194000	132800	103000	66500	198700	54700	71300	100200	146256
Dinamarca	137300	96500	52900	97600	70000	62800	113700	75000	197300	75700
España	5025000	11641100	3685400	2612900	4536600	6332600	2141300	6276700	1457100	1579700
Finlandia	130890	179820	204210	935150	458338	76094	17316	525703	869422	20078
Francia	511500	1094000	800225	528000	497300	359200	510900	500500	783765	444064
Grecia	17829399	6523896	9280631	23440717	5839663	2830017	1602316	665666	449960	765336
Irlanda	264339	143393	50358	222916	85513	190609	60987	25550	130300	114585
Italia	4605714	3315143	4436100	5181300	2985000	2737100	3411000	3374000	909300	1930000
Luxemburgo	110	0	0	10	0	0	0			
Países Bajos	58276	8922	23820	206717	96356	85416	44673	47387	691500	7400
Portugal	113200	197900	387400	146500	123800	189900	79900	96800	62900	52800
Reino Unido	3546000	3702000	4128000	1903000	761000	528000	649000	278000	415000	1303300
Suecia	14726	797416	409713	770356	21724	28141	189828	52398	627291	61348
Estados Unidos	4468800	4381400	16529900	5925500	4583600	3988600	3981200	5021500	5771200	4888600
Canadá	3810910	4901260	3701360	5079190	2516090	2110180	1516640	1606580	1583070	3351850
Australia	1311900	1641400	1202400	1376500	1610600	941200	635800	501600	547600	928500
México	2677100	2097500	1519600	1598800	1619500	1601900	1843000	1370400	150123	163353
Japón	256100	173797	219592	144511	96445	231424	116003	85377	76971	42809

Fuente: Laborsta-OIT, Labour Disputes-Eurostat, y elaboración propia.

Nota: Datos relacionados con Alemania a anteriores al 3 de noviembre de 1990 tan sólo corresponden a la República Federal Alemana.

Fuentes de información por cada país: a) Registro de organizaciones de empleadores/trabajadores: Austria, Dinamarca, Finlandia; b) Registro de relaciones laborales: España, Francia, Portugal, Canadá, México, Japón, Alemania; c) Recolección especial de datos: Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Australia, d) Fuente ignorada: Luxemburgo.

Tabla 165. Evolución de la conflictividad medida por la tasa de días no trabajados en una perspectiva comparada de una selección de países de la UE-15 y otros países occidentales, 1976-1996

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Alemania						0.4	0.2	0.2	1.3	2.3	1.4	0.7	2.6	18.0	6.8	7.4	2.9
Bélgica	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7	43.6	33.4	21.6	64.8	18.1	23.8	33.3	48.3
España									988.8	300.6	207.7	359.8	512.1	180.9	535.1	121.0	122.7
Finlandia							1378.0	65.0	89.0	101.0	462.0	238.0	40.0	11.0	331.0	547.0	11.2
Francia											66.1	46.9	36.7	48.1	38.8	300.5	57.3
Italia																	133.4
Países Bajos							8								0	0	
Reino Unido															12	18	55
Canadá													195.2	140.0	146.1	141.0	296.3
Australia								223	269	190	217	265	147	100	76	79	131

Fuente: Laborsta-OIT, Labour Disputes-Eurostat, y elaboración propia.

Nota: Datos relacionados con Alemania a anteriores al 3 de noviembre de 1990 tan sólo corresponden a la República Federal Alemana.

Fuentes de información por cada país: a) Registro de organizaciones de empleadores/trabajadores: Finlandia; b) Registro de relaciones laborales: España, Francia, Canadá, Alemania; c) Recolección especial de datos: Bélgica, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Australia.

Tabla 166. Principales indicadores de la conflictividad laboral en España, según datos del Ministerio de Trabajo, 1976-1996

	Nº Huelgas	Trabajadores participantes	Jornadas perdidas
1976	3.662	2.556.763	13.593.100
1977	1.194	2.955.000	16.641.700
1978	1.128	3.863.855	11.550.911
1979	2.680	5.713.193	18.916.984
1980	2.103	2.287.000	4.712.516
1981	1.993	1.944.900	5.153.800
1982	1.810	1.058.900	2.787.600
1983	1.451	1.483.600	4.414.700
1984	1.498	2.242.200	6.357.800
1985	1.092	1.511.200	3.223.500
1986	914	857.800	2.279.400
1987	1.497	1.881.200	5.025.000
1988	1.193	6.692.200	11.641.100
1989	1.047	1.382.100	3.685.400
1990	1.231	864.000	2.442.800
1991	1.552	1.994.500	4.421.300
1992	1.296	5.169.600	6.246.500
1993	1.131	3.997.200	2.012.700
1994	890	5.427.708	6.254.669
1995	866	569.906	1.442.906
1996	807	1.078.034	1.552.872

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.43 y elaboración propia.

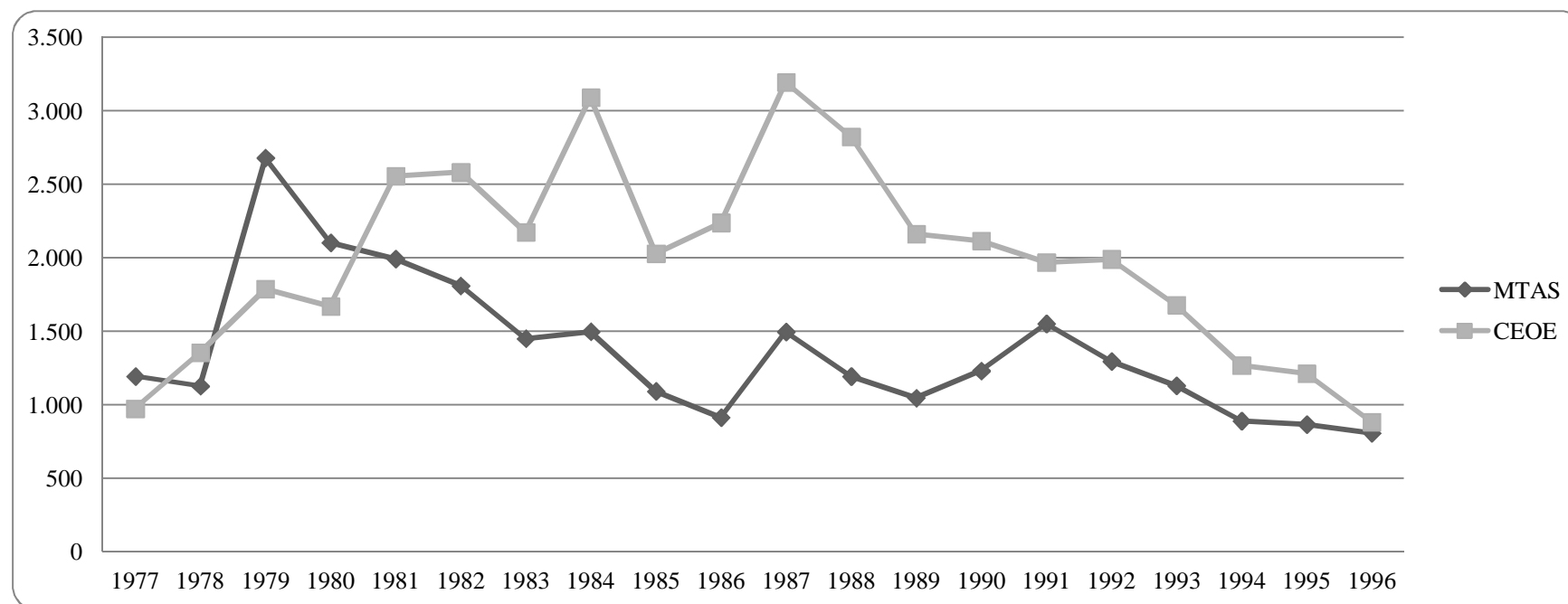
Nota: No se dispone de datos de Cataluña sobre jornadas perdidas para 1980-1982, y cualquier clase de datos para 1983-1985
No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Tabla 167. Principales indicadores de la conflictividad laboral en España, según datos de la CEOE, 1977-1996

	Nº Huelgas	Huelguistas	Jornadas perdidas
1977	974	2.317.0	11.565.3
1978	1.356	3.633.0	15.467.3
1979	1.789	5.752.3	21.383.4
1980	1.669	2.461.1	13.578.2
1981	2.556	3.358.2	9.320.0
1982	2.582	1.634.1	7.229.4
1983	2.174	2.997.5	9.796.6
1984	3.091	5.495.5	15.259.1
1985	2.029	4.530.8	8.022.6
1986	2.239	1.793.2.	6.349.5
1987	3.194	3.222.7	10.264.1
1988	2.823	8.001.1	14.565.2
1989	2.162	2.485.9	7.383.2
1990	2.115	1.723.2	5.002.4
1991	1.969	2.300.6	6.143.2
1992	1.991	7.351.4	10.998.7
1993	1.679	1.243.6	3.132.6
1994	1.268	4.219.9	6.257.6
1995	1.212	882.4	3.132.6
1996	883	1.190.0	1.994.9

Fuente: Datos procedentes de, COMISIONES OBRERAS. SECRETARÍA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de la Moncloa al AES*, LUQUE David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010 y elaboración propia.

Gráfico 34. Evolución de la actividad huelguística en España en número de huelgas por año y en perspectiva comparada entre los datos del MTAS y la CEOE, 1977-1996



Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.43, COMISIONES OBRERAS. SECRETARÍA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de la Moncloa al AES*, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010, y elaboración propia

Tabla 168. Años con mayor número de conflictos durante la época socialista una vez eliminado el efecto de las huelgas generales de 1988, 1992 y 1994

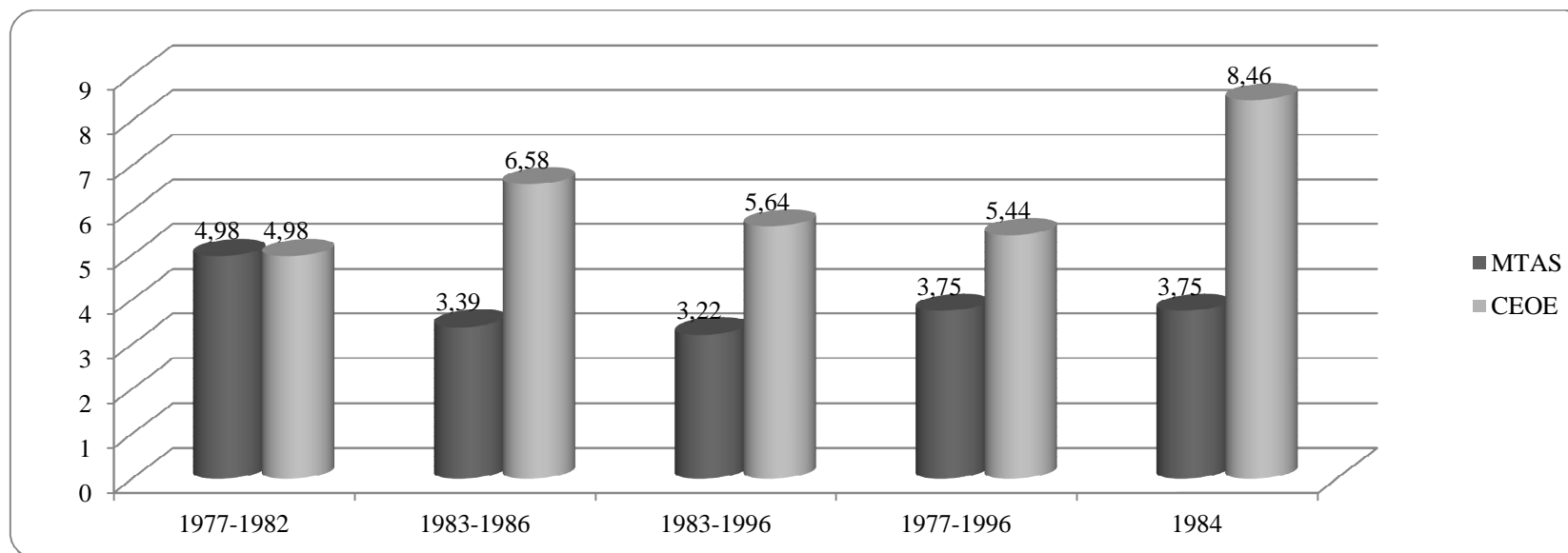
	Nº Huelgas	Trabajadores participantes	Jornadas perdidas
1983	1.451	1.483.600	4.414.700
1984	1.498	2.242.000	6.357.800
1985	1.092	1.511.200	3.223.500
1987	1.497	1.881.200	5.025.000
1988	1.192	1.894.500	6.843.400
1989	1.047	1.382.100	3.685.400
1990	1.231	864.000	2.442.800
1991	1.552	1.994.500	4.421.300
1992	1.295	1.678.600	4.055.800
1994	889	452.8000	1.279.800

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.43, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010, y elaboración propia.

Tabla 169. Evolución de las principales variables de la conflictividad medida en promedio de años y en total, 1977-1996

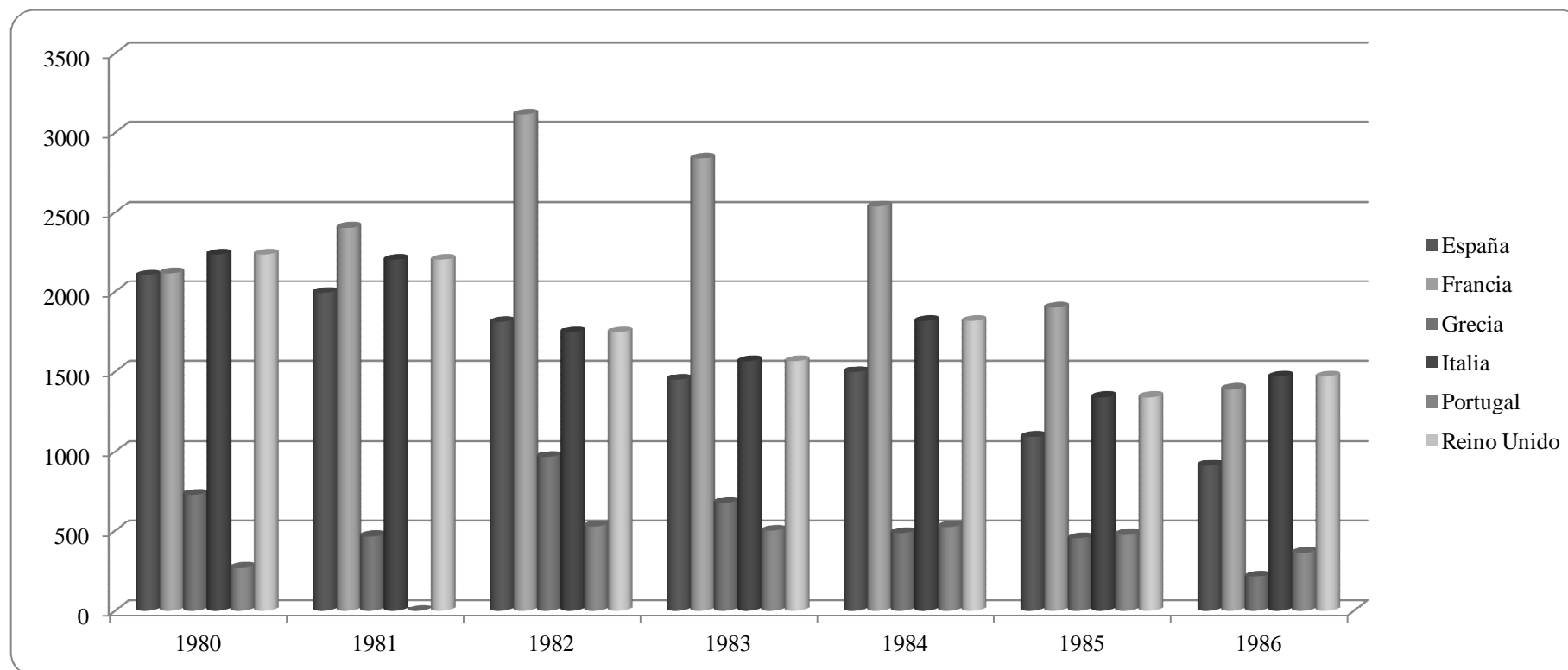
	Nº Huelgas	Participantes	Jornadas perdidas
1977-1982			
MTAS	1.818	2.970.475	9.960.585
CEOE	1.821	3.192.616	13.090.600
1983-1986			
MTAS	1.239	1.523.700	4.068.850
CEOE	2.383	4.341.267	9.856.950
1983-1996			
MTAS	1.176	2.510.803	4.357.189
sin HG	1.176	1.563.403	3.502.670
CEOE	2.059	2.511.123	7.735.878
1977-1996			
MTAS	1.369	2.648.705	6.038.208
sin HG	1.369	1.985.524	5.440.044
CEOE	1.988	3.410.542	9.342.295
Año 1984			
MTAS	1.498	2.242.200	6.357.800
CEOE	3.091	5.495.500	15.259.100

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.43, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010, y elaboración propia.

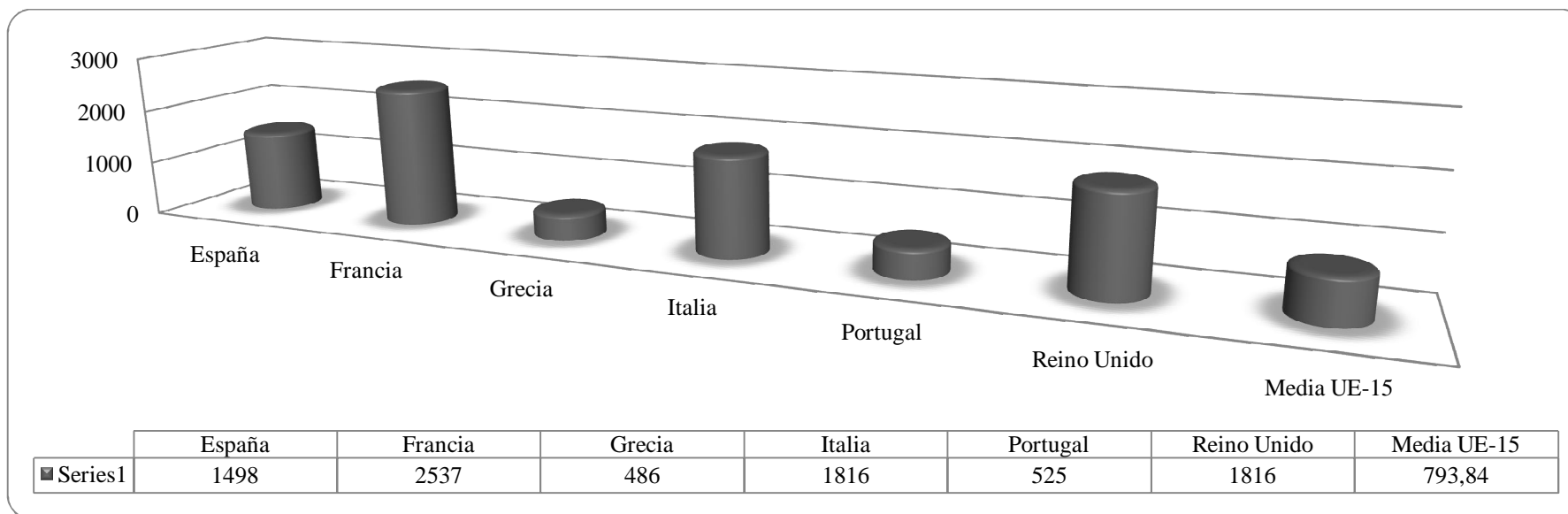
Gráfico 35. Evolución del promedio de huelgas diarias por conjunto de años y para el total, 1977-1996

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.43, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010, y elaboración propia.

Gráfico 36. Evolución de la conflictividad laboral, medida en número de huelgas, en un conjunto de países europeos durante la primera parte de la década de los años ochenta en plena «oleada neoliberal» (1980-1986)

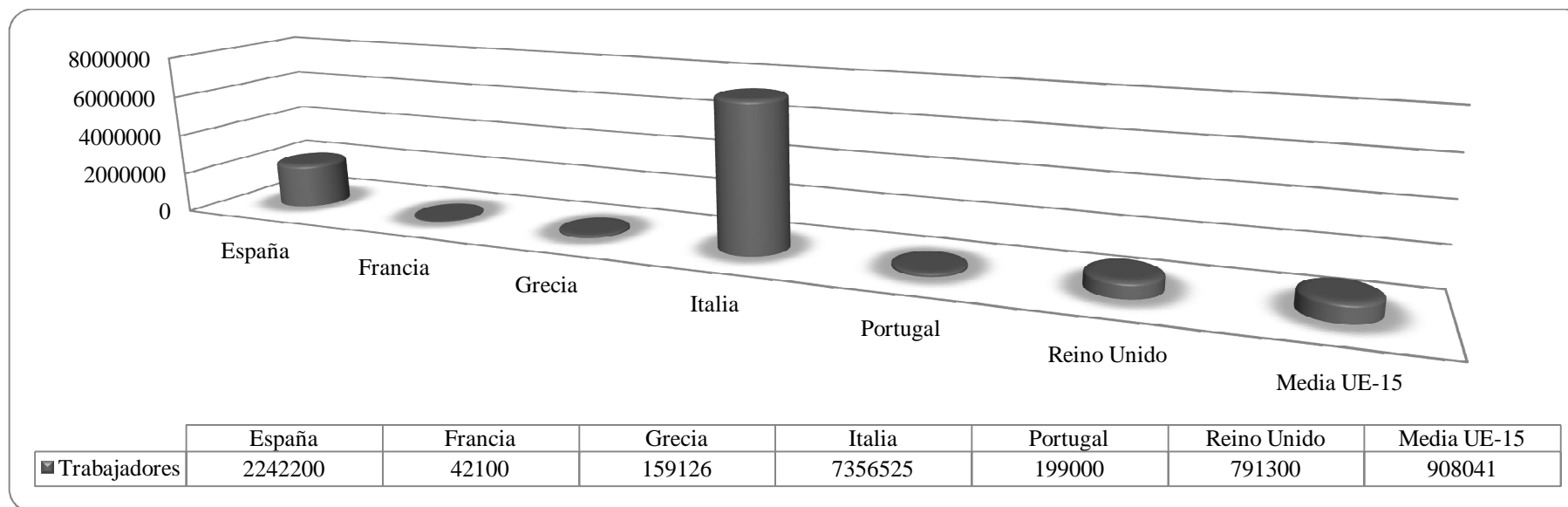


Fuente: Laborsta-OIT, Labour Disputes-Eurostat, y elaboración propia.

Gráfico 37. Número de huelgas en España y en los países de su entorno en 1984

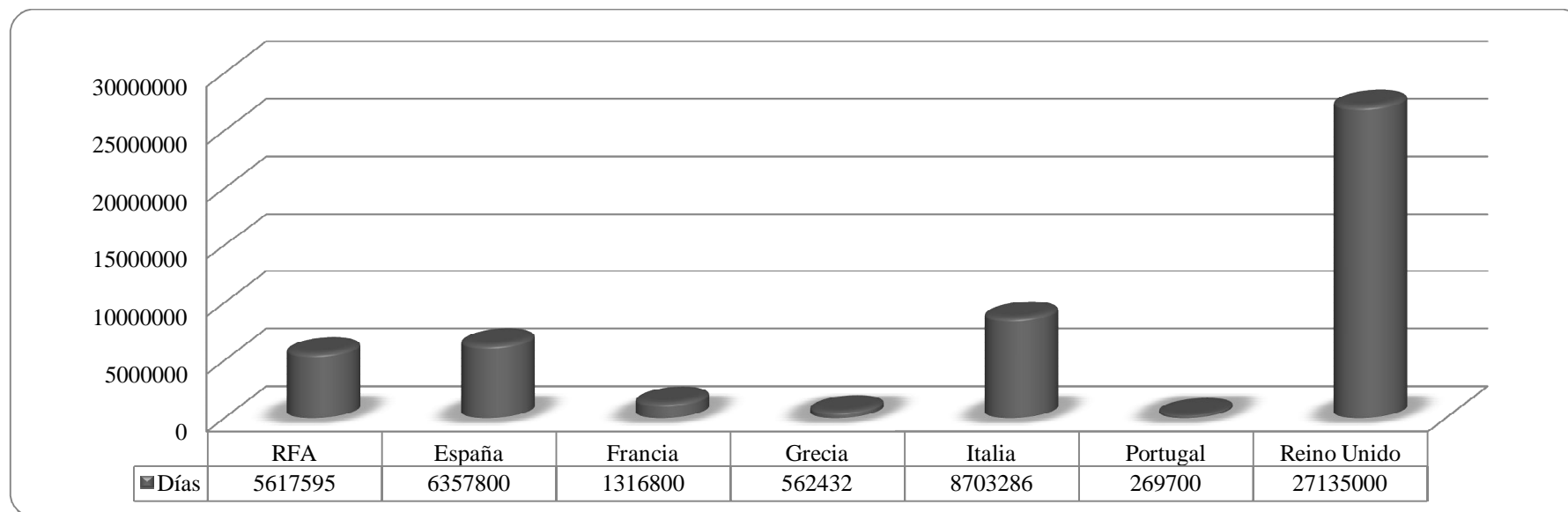
Fuente: Laborsta-OIT, Labour Disputes-Eurostat, y elaboración propia.

Nota: se carecen de datos para Alemania, Bélgica y Luxemburgo a la hora de calcular la media UE-15.

Gráfico 38. Número total de participantes en huelgas laborales en España y en los países de su entorno en 1984

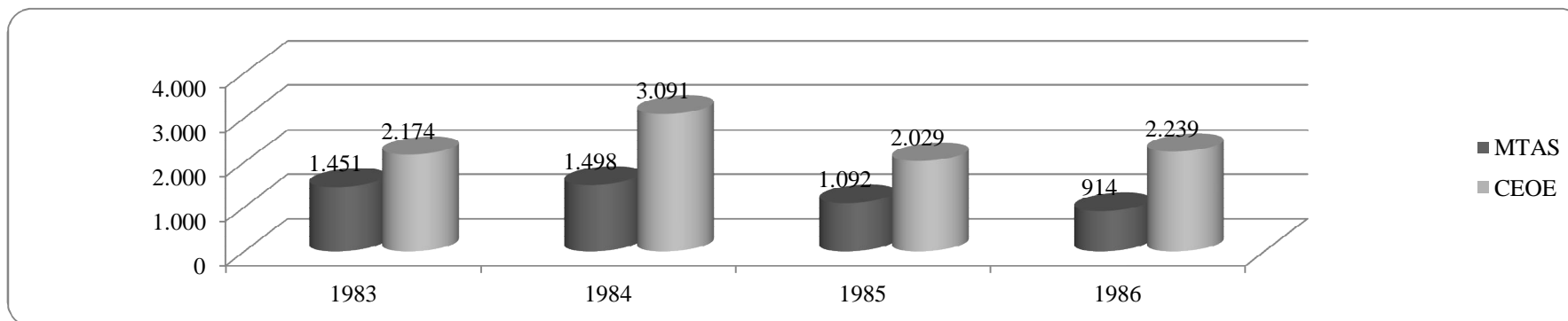
Fuente: Laborsta-OIT, Labour Disputes-Eurostat, y elaboración propia.

Nota: se carecen de datos para Bélgica y Luxemburgo a la hora de calcular la media UE-15.

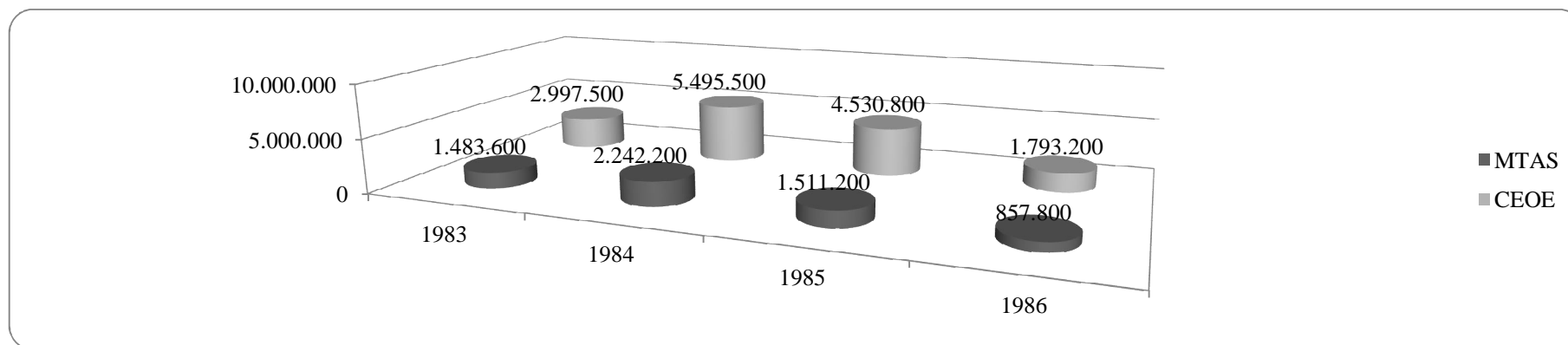
Gráfico 39. Días no trabajados en España por huelgas España y en los países de su entorno en 1984

Fuente: Laborsta-OIT, Labour Disputes-Eurostat, y elaboración propia.

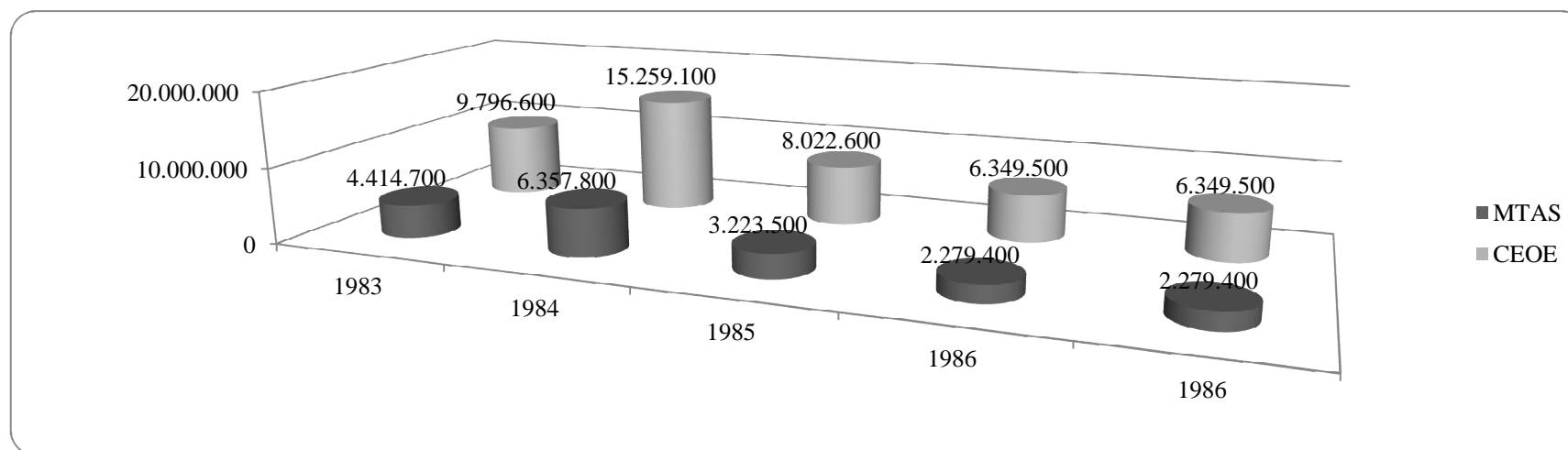
Nota: se carecen de datos para Bélgica y Luxemburgo a la hora de calcular la media UE-15.

Gráfico 40. Evolución de la actividad huelguística, según el MTAS y según la CEOE, durante la primera legislatura socialista, 1983-1986

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.43, COMISIONES OBRERAS. SECRETARÍA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de la Moncloa al AES*, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010, y elaboración propia.

Gráfico 41. Número de trabajadores participantes en huelgas laborales, según el MTAS y según la CEOE, durante la primera legislatura socialista, 1983-1986

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), CARRERAS, Albert & TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.43, COMISIONES OBRERAS. SECRETARÍA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de la Moncloa al AES*, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010, y elaboración propia

Gráfico 42. Número de jornadas perdidas en huelgas laborales, según el MTAS y según la CEOE, durante la primera legislatura socialista, 1983-1986

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.43, COMISIONES OBRERAS. SECRETARÍA CONFEDERAL DE FORMACIÓN Y CULTURA, *De los Pactos de la Moncloa al AES*, LUQUE, David, “Las huelgas en España: tres décadas de actividad huelguística tras la dictadura” en *X Congreso Español de Sociología*, Pamplona, julio 2010, y elaboración propia.

Tabla 170. Evolución de los principales indicadores básicos de la actividad huelguística en España, 1976-1996

	Magnitud (miles)	Duración Días		Magnitud (miles)	Duración Días
1976	2320,8	3,78	1988	5609,4	1,74
1977	2475,7	5,63	1988 (<-HG)	1588,9	3,62
1978	3425,5	2,99	1989	1320	2,67
1979	2131,7	3,31	1990	701,1	2,83
1980	1252,7	3,61	1991	1252,6	2,27
1981	861,5	5,47	1992	3988,4	1,21
1982	714,3	3,19	1992 (<-HG)	1295,8	2,42
1983	1022,7	2,98	1993	881,5	2,02
1984	1496,7	2,84	1994	6097,8	1,15
1985	1383,7	2,13	1994 (<-HG)	508,4	2,83
1986	938,7	2,66	1995	617,9	2,47
1987	1256,5	2,67	1996	1335,8	1,44

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales en el Estado Español (1976-2005)”, tabla 2, y elaboración propia.

Nota: No se dispone de datos de Cataluña sobre jornadas perdidas para 1980-1982, y cualquier clase de datos para 1983-1985.
No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Tabla 171. Evolución de los principales básicos de la actividad huelguística en España medidos en promedio para un conjunto de años y en total, 1976-1996

	1976-1982	1983-1986	1983-1996	1983-1996 (sin HG)	1976-1996	1976-1996 (sin HG)	1984
Magnitud	1883,17	1210,45	1993,05	1114,3	1956,42	1370,59	1496,7
Días	3,99	2,65	2,22		2,81		2,84

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales en el Estado Español (1976-2005)”, tabla 2, y elaboración propia.

Nota: No se dispone de datos de Cataluña sobre jornadas perdidas para 1980-1982, y cualquier clase de datos para 1983-1985.
No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Tabla 172. Huelgas por sectores de actividad, 1982-1996. Participantes (miles)

	Agricultura	Sectores no agrarios	Industria	Construcción	Servicios	Huelgas Generales	Total
1982	9	1.898,80	1.268,60	367,5	262,7	80,9	1.988,70
1983	635,6	2.674,60	1.296,90	569,9	807,9	372,8	3.683,10
1984	130,5	3.248,50	1.428,10	1.385,40	435,00	850	4.229,00
1985	50,5	1.157,10	746,40	158	252,7	1.004,90	2.212,50
1986	24,7	767,80	299,90	8,5	459,4	65,4	857,90
1987	14,7	1.666,70	494,90	333,2	838,6	199,8	1.881,20
1988	6,2	1.828,90	745,10	465	618,8	4.857,10	6.692,20
1989	35,9	1.341,20	1.002,10	35,8	303,3	5	1.382,10
1990	20,1	798,20	399,00	130,1	269,6	45,1	863,90
1991	20,3	1.317,40	703,20	127,6	486,7	606,7	1.944,50
1992	4	1.373,30	558,10	21,5	793,8	3.792,30	5.192,70
1993	16,2	878,80	579,40	30,4	269	102,3	997,20
1994	1,1	427,80	281,00	26,9	119,9	4.998,80	5.427,70
1995	43,7	462,20	232,80	62,1	167,3	64	569,90
1996	4,5	1.054,40	289,10	126,3	638,9	19,10	1.077,90

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.44.

Nota: No se dispone de datos de Cataluña sobre jornadas perdidas para 1980-1982, y cualquier clase de datos para 1983-1985.

No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

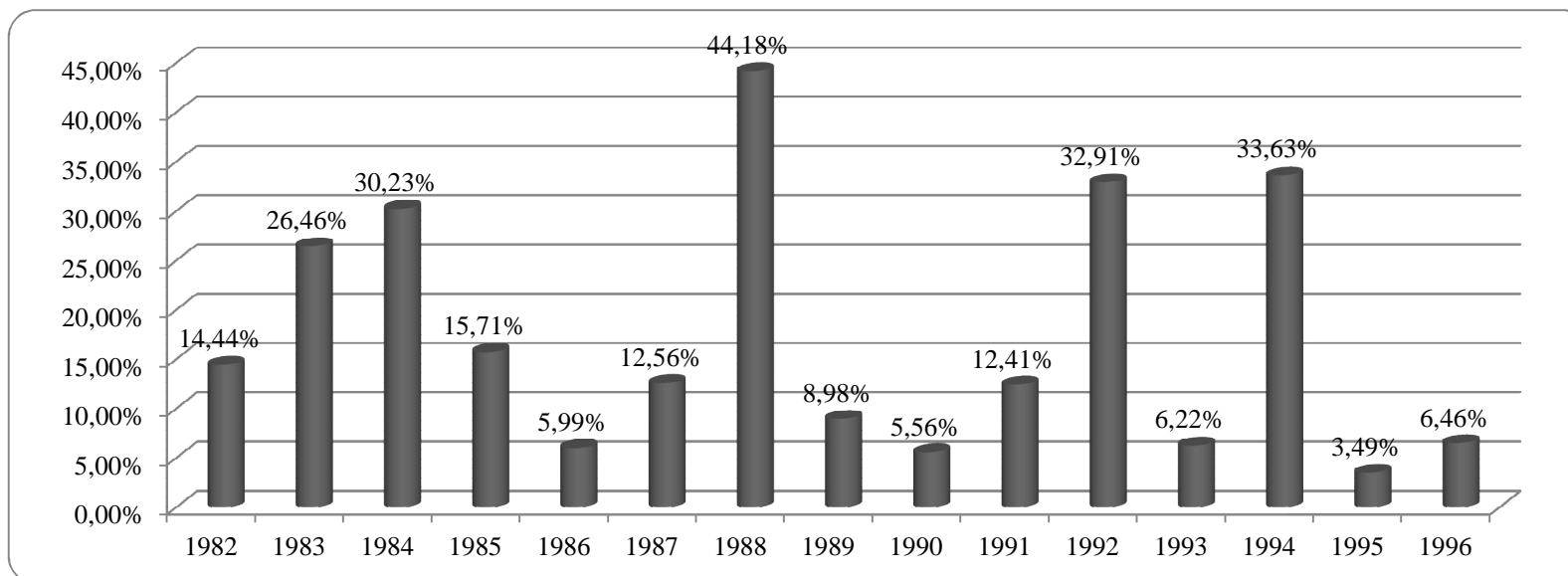
Tabla 173. Cuadro comparativo de la participación de la población activa en conflictos laborales durante la época socialista, 1982-1996. Participantes (miles)

	Huelgas Generales	Total	Población Activa	Ocupados	Parados
1982	80,9	1.988,70	13.763,70	11.477,80	2.286,00
1983	372,8	3.683,10	13.915,20	11.414,00	2.501,10
1984	850	4.229,00	13.988,60	11.040,30	2.948,40
1985	1.004,90	2.212,50	14.080,80	11.056,30	3.024,50
1986	65,4	857,90	14.314,00	11.359,20	2.954,80
1987	199,8	1.881,20	14.966,30	12.011,10	2.955,20
1988	4.857,10	6.692,20	15.144,80	12.371,20	2.773,60
1989	5	1.382,10	15.378,20	12.781,70	2.596,50
1990	45,1	863,90	15.541,60	13.041,80	2.499,80
1991	606,7	1.944,50	15.668,10	13.015,10	2.653,00
1992	3.792,30	5.192,70	15.777,80	12.616,80	3.161,00
1993	102,3	997,20	16.020,30	12.203,30	3.817,00
1994	4.998,80	5.427,70	16.134,80	12.278,10	3.856,70
1995	64	569,90	16.300,40	12.590,00	3.710,40
1996	19,10	1.077,90	16.663,40	13.064,50	3.598,90

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), EPA, MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.44 y elaboración propia.

Nota: No se dispone de datos de Cataluña sobre jornadas perdidas para 1980-1982, y cualquier clase de datos para 1983-1985.

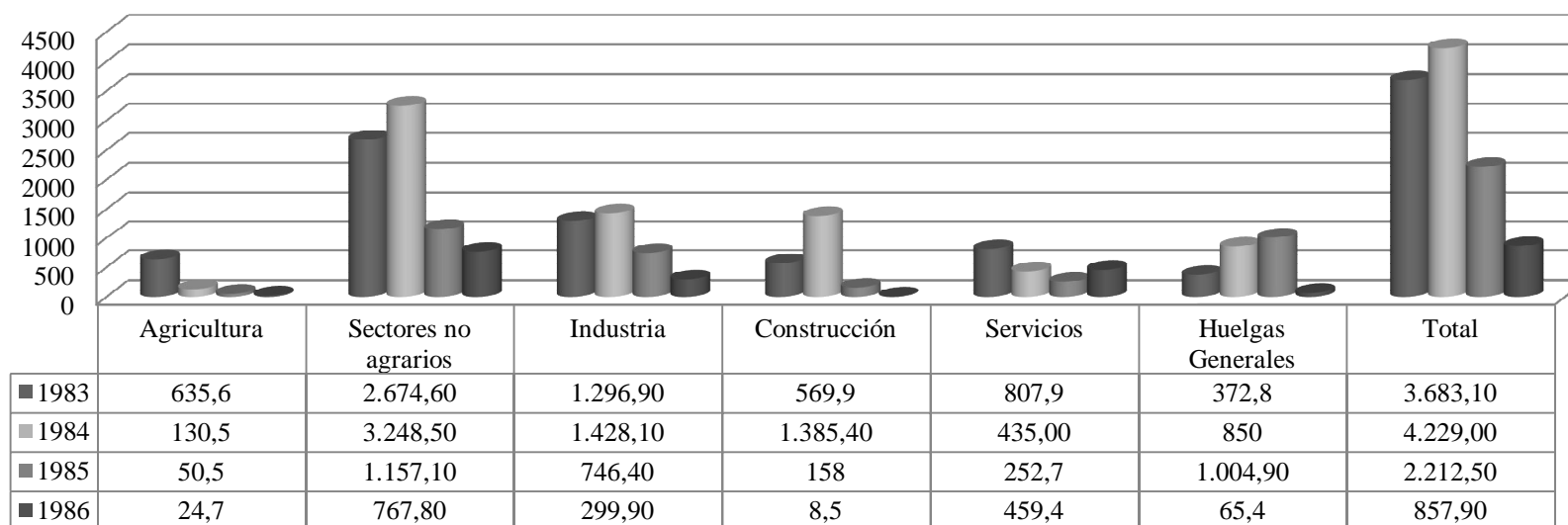
No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Gráfico 43. Cálculo de la evolución participación de la población activa en conflictos laborales durante la época socialista, 1982-1996

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), EPA, MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.44.

Nota: No se dispone de datos de Cataluña sobre jornadas perdidas para 1980-1982, y cualquier clase de datos para 1983-1985.

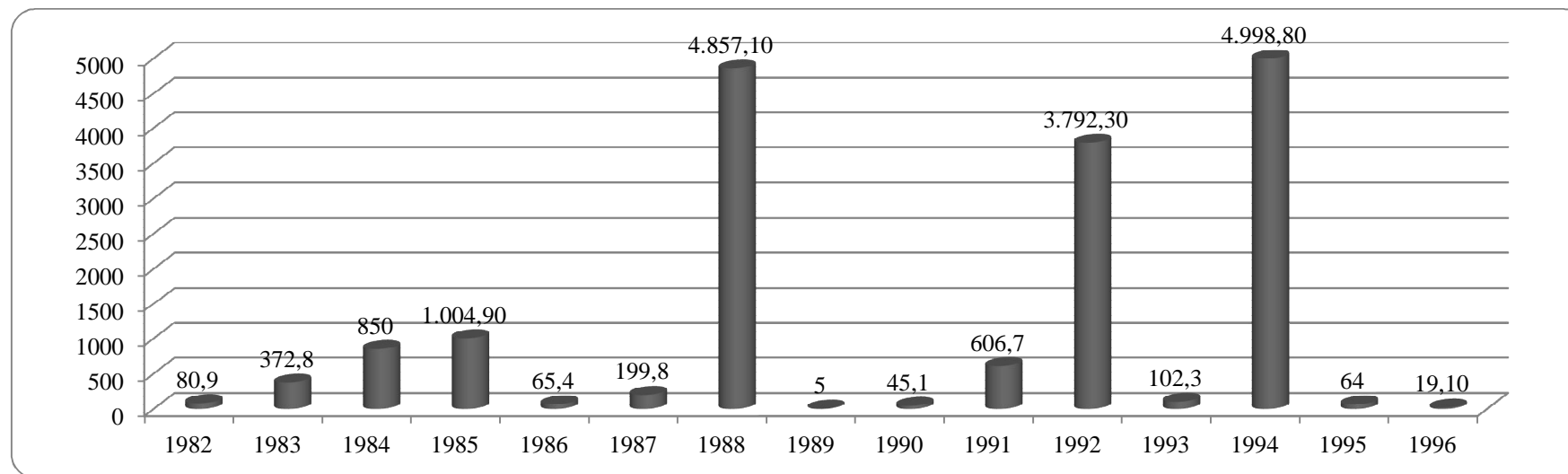
No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Gráfico 44. Evolución del número de participantes (miles) en huelgas laborales por sector y año durante la primera legislatura socialista, 1983-1986

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.44 y elaboración propia.

Nota: No se dispone de datos de Cataluña sobre jornadas perdidas para 1980-1982, y cualquier clase de datos para 1983-1985.

No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Gráfico 45. Evolución de la participación (en miles) en huelgas generales durante la época socialista, 1982-1992

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert en TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.44.

Nota: No se dispone de datos de Cataluña sobre jornadas perdidas para 1980-1982, y cualquier clase de datos para 1983-1985.
No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Tabla 174. Principales variables de la conflictividad laboral por sector, 1986-1996

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Industria											
% Huelgas	60,2	55,2	58	58,2	58,2	51,5	56,8	61,1	58,8	58,5	56
% Huelguistas	35	26,3	11,1	72,5	46,2	36,2	10,8	58,1	5,2	40,8	26,8
% Jornadas no trabajadas	38,3	29,7	12,8	59,2	39,4	38,9	25,6	55,4	13,7	45,3	37,9
Magnitud	545,3	599,2	1076,2	1645,5	557,3	880,1	758,3	838,5	537,3	459,2	639,6
Duración	2,91	3,01	2	2,18	2,41	2,45	2,86	1,92	3,06	2,81	2,03
Construcción											
% Huelgas	6,1	6,4	4,6	3,5	3,3	4,5	4,3	5,7	5,5	5,1	6,9
% Huelguistas	1	17,7	6,9	2,6	15,1	6,6	0,4	3	0,5	10,9	11,7
% Jornadas no trabajadas	2,8	22,8	17,2	7,4	11,1	20,7	0,7	3,1	0,9	13,1	23,1
Magnitud	151,8	3470,8	8454,5	967,6	3173,2	1822,9	383,9	467,7	551	1411,4	2255,4
Duración	7,59	3,43	4,31	7,65	2,08	7,16	1,93	2,02	2,07	3,03	2,83
Servicios											
% Huelgas	31,7	36,5	35,5	36,4	36,4	41,8	36	30,9	33,9	34,1	34
% Huelguistas	53,5	44,6	9,2	21,9	19,6	25	15,4	27	2,2	29,4	59,2
% Jornadas no trabajadas	51	41,2	27,3	24,5	43,1	22,3	33,9	29,1	5,3	28,5	37,2
Magnitud	1584,1	1533,1	1462,1	796,1	378,6	751,1	1699,8	768,6	397	567,1	2331,8
Duración	1,36	0,74	0,46	0,88	0,36	0,76	0,8	1,31	1,19	1,38	4,04

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales en el Estado Español (1976-2005)”, tabla 5, y elaboración propia

Nota: No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Tabla 175. Evolución de los motivos de la convocatoria de las huelgas laborales y no laborales, 1986-1996

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Negociación Colectiva											
% Huelgas	31,2	39,3	38,5	43,5	38	34,4	33,1	30	26,5	27,9	27,8
Magnitud	1155,8	1940,6	2327,7	2610,3	972	1287,5	962,9	1448,4	951,3	798,3	974,6
Duración	2,98	2,49	3,34	2,7	3,6	3,74	4,02	2,4	2,55	2,94	2,34
No Negociación Colectiva											
% Huelgas	62,3	55	56	50,5	56,5	60,1	59,8	64,3	69,2	66,2	64,7
Magnitud	804,7	685,4	1170,8	295,7	497	1147,5	1333,3	506,9	299,8	476,3	527,6
Duración	2,62	3,45	4,13	2,83	2,09	1,52	2,06	1,85	3,55	2,67	2,24
Huelgas no laborales											
% Huelgas	6,6	5,7	5,5	6	5,5	5,5	7,1	5,7	4,3	5,9	7,6
Magnitud	1181,7	2046,5	73359,1	603,2	936,8	2180,2	40470,7	2120	132065,8	2035,3	9578,7
Duración	1,41	1,38	1	1,04	1,31	1,21	0,66	1,1	1	1,4	0,73

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales en el Estado Español (1976-2005)”, tabla 3, y elaboración propia.

Nota: No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Tabla 176. Evolución de las huelgas convocadas, tanto por magnitud como por duración, en relación a diversas cuestiones laborales, de solidaridad o ante iniciativas político económicas (1986-1996)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Presión iniciar negociación											
Magnitud	1025,8	2186,2	3193,2	1431,7	313,9	1403,6	1505,7	375,6	303,4	177,5	2030,6
Duración	2,32	2,02	0,36	3,1	9	3,24	2,28	2,78	5,42	2,61	1,79
Presión durante negociación											
Magnitud	1247,1	1891,9	1790,6	3441,3	1267,6	1332,2	841,1	1955,6	1260,6	983	492,9
Duración	3,37	2,68	3,03	2,59	3,17	3,86	4,79	2,37	2,33	2,96	3,35
Organización del trabajo											
Magnitud	285	377,4	595,5	198,3	280,2	420,8	339,2	162,5	1916	431,9	169,8
Duración	3,56	7,87	1,72	5,97	2,75	2,25	5,12	2,35	3,08	1,15	1,54
Impago de salarios											
Magnitud	48,8	53,4	71,6	59,1	84,2	86,3	74,4	88,2	55	96,1	107,5
Duración	13,71	7,16	4,36	5,37	4,29	4,35	4,99	4,36	7,93	3,97	2,6
Solidaridad											
Magnitud	926,7	3941,9	1111,5	820,5	1596,4	1224,2	1770,4	3415,8	433,3	5181,8	338,9
Duración	1,73	1,39	1,04	0,98	1,11	1	0,93	0,97	0,81	1,43	3,23
Anuncio medidas económicas											
Magnitud	1515,8	2461,1	480500	454,5	613,3	2286,7	85869	1906,9	263084,2	762,1	22046,2
Duración	0,95	1,15	1	0,92	3,02	1,22	0,65	1,27	1	1,69	0,7

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales en el Estado Español (1976-2005)”, tabla 4, y elaboración propia.

Nota: No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

Tabla 177. Número de huelgas según la forma de finalización, 1986-1996

	Plazo Fijado	Decisión de los trabajadores	Negociación	Mediación de terceros	Resto	Total
1986	314	382	100	57	123	977
1987	660	599	104	65	133	1.561
1988	522	552	62	25	107	1.268
1989	498	421	77	34	53	1.083
1990	571	510	90	33	92	1.296
1991	882	459	96	59	99	1.595
1992	744	386	72	42	100	1.344
1993	627	374	62	28	107	1.198
1994	446	313	44	30	54	887
1995	477	276	56	24	38	871
1996	450	231	44	36	47	808

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), MALUQUER, Jordi y LLONCH, Montserrat, “Trabajo y relaciones laborales” en CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (coords.), *Estadísticas históricas de España (siglos XIX y XX)*, cuadro 15.44.

Nota: No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1990.

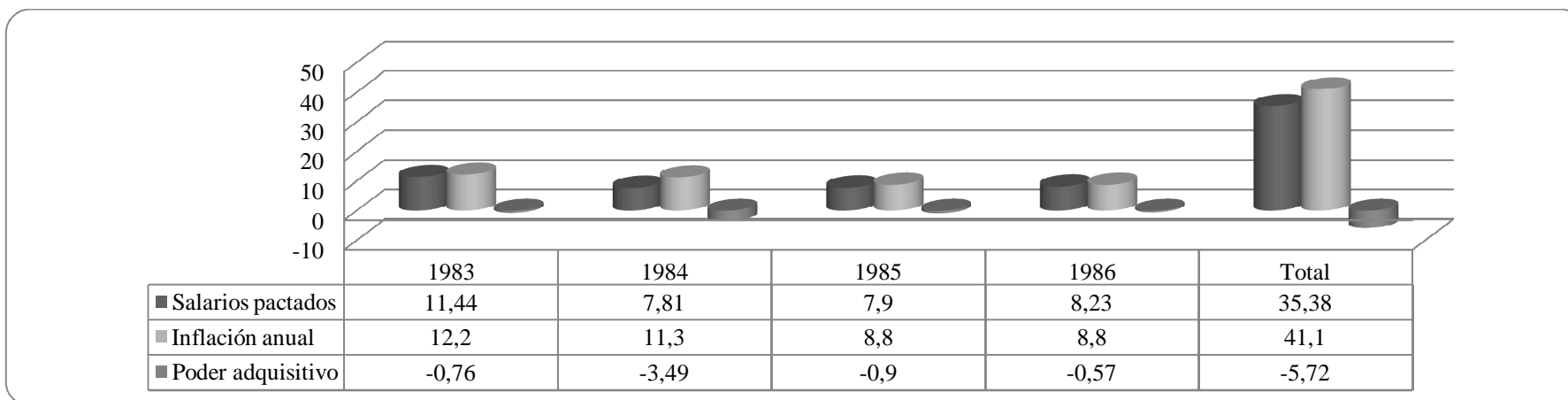
Tabla 178. Evolución de la actividad huelguística por Comunidades Autónomas, 1986-1992 (%)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Andalucía	9,6	18	11,9	15,9	11,5	16,8	16,5	16,9	15,5	13,9	15,7
Aragón	2,4	3,7	1,2	3,1	3,8	2,4	2,6	2,9	2,9	1,6	2,6
Galicia	12,2	18,8	9,3	12,5	10,3	12,1	9,4	12,8	11,6	11,8	10,6
Asturias	14,4	11,7	16,1	15,2	14,5	12,6	10,3	7,2	8,1	8,4	8,6
Baleares	0,4	1	1,5	0,1	0,2	0,2	0	0,8	0,6	0,3	0
Canarias	3,3	2,9	2,2	4	3,2	2,1	2,1	1,9	2,5	2,8	4
Cantabria	1,5	2,1	1,7	1,8	1,8	1,5	1,9	1,6	2,6	1,6	1,4
Castilla-La Mancha	2,6	1,9	1,8	2,5	2,1	3,1	1,7	1,9	2,2	2,8	2,1
Castilla León	7,5	9	10,1	9,6	7,4	8,6	5,2	7,4	4,3	5,7	7,7
Cataluña	18,3	15	16,8	12,9	8,4	7,3	9,1	9,4	8,4	10,4	6,9
País Valenciano	8,4	6,1	7	5,8	6,9	5,7	9,1	7	5,1	7	6,8
Extremadura	0,8	0,8	1,1	1,6	0,9	1	1	0,8	1,1	0,8	0,1
Madrid	13,2	12,1	14,6	11,7	11,1	11	10,4	11,1	11,6	11,8	12,8
Murcia	2,2	0,9	2,2	1,2	1,5	1,5	2,1	0,8	2,2	1,5	1
Navarra	2,5	0,9	2,2	1,2	1,5	1,5	2,1	2,7	3,1	2,9	2,4
Euskadi					14,5	11,7	15,9	13,9	16,9	14,9	16,5
Rioja	0,7	0,4	0,3	0,5	0,2	0,8	0,4	0,7	0,7	1,7	0,7
Ceuta/Melilla	0	0,2	0	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,6	0,1	0,1

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de Estadísticas Laborales* (MTAS), GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel, “Las huelgas laborales en el Estado Español (1976-2005)”, Tabla 6, y elaboración propia.

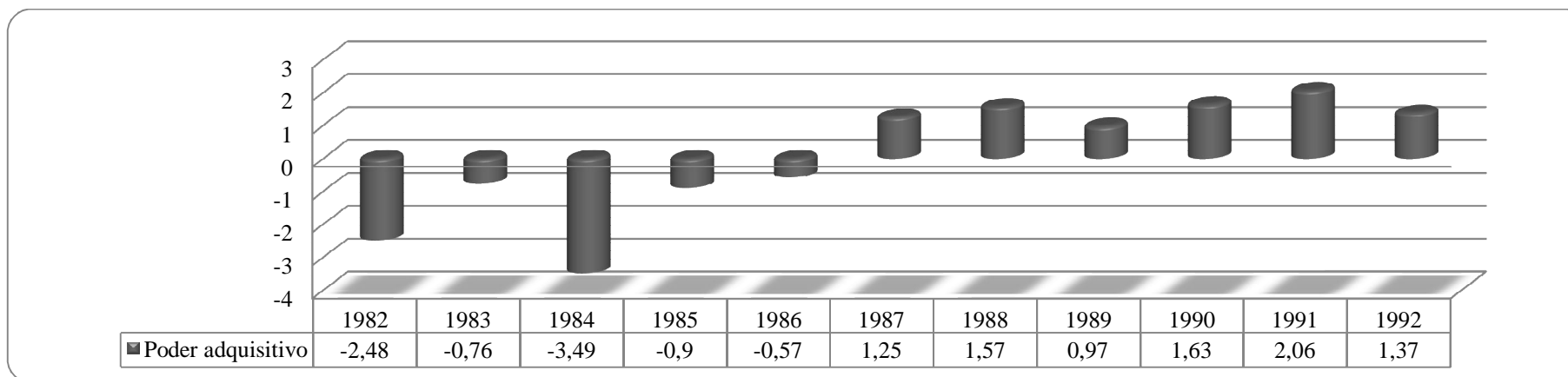
Nota: No se dispone de datos del País Vasco desde 1986 a 1989.

Gráfico 46. Evolución de los salarios pactados en la negociación colectiva, la inflación anual y el poder adquisitivo en durante la primera legislatura socialista (%)



Fuente: INE, MTAS y elaboración propia

Gráfico 47. Evolución del poder adquisitivo durante la “década del cambio”, 1982-1992 (%)



Fuente: INE, MTAS y Asuntos Sociales, y elaboración propia.

